

# **GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA**

## **Auge y colapso de un fragmento de estado o la violenta transición de un orden imperial-absolutista a un orden nacional-republicano (1600-1912).**

por Eduardo R. Saguier  
Investigador CONICET-Museo Roca  
e-mail: [saguier@ssdnet.com.ar](mailto:saguier@ssdnet.com.ar)  
<http://www.er-saguier.org>

### **ABSTRACT**

En esta obra aspiramos a develar la diversidad y/o heterogeneidad de una aparente totalidad compleja y multidimensional, estudiando las auto-representaciones y los imaginarios que los actores de los diferentes estamentos, clases sociales y agentes procedentes de diferentes períodos y espacios geográficos (virreinos, gobernaciones, ciudades, provincias, naciones) tuvieron en las diversas transiciones y fracturas políticas. Asimismo, indagamos la integración de los respectivos períodos y bloques históricos; las causas y las consecuencias de cada fractura o crisis de transición; y las percepciones o conciencia que las diferentes elites y clases tuvieron tanto del orden imperial-absolutista como del orden nacional liberal-republicano. También indagamos las causales de las crisis y la metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de una auto-representación y de un imaginario político-cultural, con sus derivaciones en la balcanización y las migraciones forzosas individuales y colectivas, así como las diferentes estrategias culturales, políticas, sociales y económicas adoptadas para paliar dichas crisis (despotismo, cesarismo, nepotismo, clientelismo, prebendarismo, patrimonialismo, patriarcalismo, corporativismo, mercantilismo, centralismo, federalismo, unitarismo).

Este estudio se extiende a lo largo de cinco (5) tomos repartidos en un centenar de capítulos. Incluye en su comienzo una Introducción General, un Índice General, un Abstract general (que incluyen casi seiscientas palabras-claves), y al final una Conclusión General y una Bibliografía General. Asimismo, en cada tomo se incluye una introducción y una conclusión, así como un Índice, un abstract, una bibliografía y una colección de Palabras-Clave. Los abstracts por capítulo, amén de un resumen incluyen un registro de palabras-clave, y la referencia bibliográfica de cada capítulo, con el título, lugar de edición, fecha y paginado de la publicación periódica que dio cabida en el pasado al contenido del capítulo. La mención de las tablas, cuadros, apéndices, listados y gráficos es incluida en el Índice del tomo respectivo. En el tomo I analizamos la violenta subordinación de una población al orden imperial-absolutista (1580-1713). En el tomo II investigamos la crisis del orden imperial-absolutista (1713-1808). En el tomo III analizamos la política en el orden nacional-republicano (1810-1912). En el tomo IV estudiamos la milicia como campo de lucha en la estructura política nacional. Y en el tomo V exploramos las instituciones como espacio de combate faccioso (Educación, Periodismo, Justicia, Comunicaciones).

## Índice de Tomos

- Tomo I**    **Violenta subordinación de una población a un orden imperial-absolutista (El Río de la Plata en los siglos XVII y XVIII).**
- Tomo II**    **Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del mundo colonial (Río de la Plata-siglo XVIII).**
- Tomo-III**    **Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la formación de un orden nacional-republicano (Río de la Plata/Argentina, 1808-1912).**
- Tomo-IV**    **Pretorianismo tutorial y supervivencias del orden absolutista (Argentina, 1880-1912).**
- Tomo-V**    **Perversiones institucionales y fracaso del orden nacional-republicano (Argentina, 1880-1912).**

## Índice de Secciones

- Tomo I**    **Violenta subordinación de una población a un orden imperial-absolutista (El Río de la Plata en los siglos XVII y XVIII).**

### Introducción

- Sección I-A**    **Trasiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial**
- Sección I-B**    **Configuración multicultural de un orden jerarquizado, estamental y esclavista**
- Sección I-C**    **Articulación de un *entrepôt* mercantilista con un *hinterland* minero-rural**
- Sección I-D**    **Valorización de tierras, casas y brazos.**
- Sección I-E**    **Potenciación de una economía de enclave**
- Sección I-F**    **Patrimonialización de una administración venal**
- Sección I-G**    **Corporativización de un orden burocrático-regalista**
- Sección I-H**    **Nepotización de un orden colonial-absolutista**

## **Tomo II Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del mundo colonial (Río de la Plata-siglo XVIII).**

- Sección II-A** Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y fatuamente “universal”
- Sección II-B** Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista
- Sección II-C** Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal.
- Sección II-D** Fragmentación gremial del orden monopolista.
- Sección II-E** Descomposición social del orden esclavista.
- Sección II-F** Colapso económico y ruptura del orden mercantilista
- Sección II-G** Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial
- Sección II-H** Rebeliones de originarios, crisis militar, y cuestionamiento del orden corporativo
- Sección II-I** Acortesanamiento indiano y denuncia del orden nepótico

## **Tomo-III Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la formación de un orden nacional-republicano (Río de la Plata/Argentina, 1808-1912).**

- Sección III-A** Colapso imperial y legitimaciones tradicionales, legales o carismáticas
- Sección III-B** Distribución del espacio en la transición del absolutismo al republicanismo
- Sección III-C** Retraso cultural en el orden secularizador
- Sección III-D** Conciliaciones, pactos y treguas en la gestación de un orden oligárquico
- Sección III-E** Rupturas y debacles en la formación de un orden notabiliar o elitista
- Sección III-F** Crímenes políticos en la degradación del orden republicano
- Sección III-G** Secesiones, putschs y revoluciones en la crisis del orden estatal

## **Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias del orden absolutista (Argentina, 1880-1912).**

- Sección IV-A.-** Persistencias de un orden patrimonialista y nepótico (1862-1890).
- Sección IV-B.-** Reacción cívica revolucionaria y dictadura tácita (1890-1905).
- Sección IV-C.-** Construcción de un orden oligárquico-militarista.
- Sección IV-D.-** Condicionantes globales y locales de una burocracia militar pretoriana.

## **Tomo-V Perversiones institucionales y fracaso del orden nacional-republicano (Argentina, 1880-1912).**

## Sección V-A Extorsiones en los ámbitos de la cultura

## Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder

### I.- ABREVIATURAS.

AGE=	Archivo General del Ejército
AGN=	Archivo General de la Nación
AGCMN=	Archivo General del Colegio Militar de la Nación
AHC=	Archivo Histórico de Córdoba
AHM=	Archivo Histórico de Mendoza
AHS=	Archivo Histórico de Salta
AHPBA=	Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires
AVH=	Actuaciones de Valor Histórico.
BEMGE=	Boletín del Estado Mayor General del Ejército
CEDINCI=	Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina
CEHIPE=	Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España
CMN=	Colegio Militar de la Nación
EMGE=	Estado Mayor General del Ejército
LCN=	Libros Copiadores de Notas del CMN
LO=	Libros de Ordenes del Día del CMN
MMGyM=	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina

### Repertorio de Palabras Claves

Abastos surtidos por los indios, Acción pretoriana o contra-revolucionaria, Acomodamiento de parientes, Acortamiento indiano, Acuerdismo, "actividad lúdica" de los Cabildos, Aculturación de los migrantes extranjeros, acumulación originaria, Administración de Justicia, Administración de sacramentos, Aduana, Agiotismo de los aviadores, Agiotismo de los pulperos, Agremiación de azogueros, alarmas infundadas, Alcabalas, Alcaldes, Alianzas inter-étnicas, Almacenamiento de especies monetizadas, Alta rotación inmueble, Alto endeudamiento, Escasez de inversiones, Aluvión de colonos étnicamente discriminados, Amenaza militar, Vestigios o supervivencias históricas, "Situaciones" Provinciales, Analogía garcilacista, Anti-escolasticismo, Gestación de una esfera pública proto-republicana, Aparato del estado, Apuntamiento de sucesores, Arbitraje presidencial, Arbitrios, Arrendamiento de tierras públicas, Articulación de un *entrepôt*, *Hinterland* minero-rural, Articulación de una auténtica esfera pública, Ascensos militares, Precios de tierra, Ausencia de las autoridades seculares en las funciones religiosas, autocensura, autocracia, Autonomía de las elites, autonomías provinciales, autoritarismo corporativo, autoritarismo de partido único, autoritarismo policial, autoritarismo pretoriano, autoritarismo, Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, Azoguería Potosina, Balanza comercial negativa, Balanza comercial positiva o activa, Balanzas comerciales, Bandolerismo profesional, Bandolerismo, bandoleros, Canongías, Patriciados rurales, Base económica de la pirámide financiera eclesiástica, Bastardía, Beneficio de la yerba mate, Beneficios, bonapartismo, Brecha científico-educativa,

Brechas protocolares, Curatos, Burguesía comercial local, Burla del ciudadano, Burocracia subordinada, Cabildantes, Cabildos Eclesiásticos, Cálculos demográficos, Calumnias y duelos, campaña militar, Cancheros, Cantidad de tierra distribuida, Cantidad de ventas de tierras, Capellanes con congrua, Cargos capitulares puramente electivos, Cargos políticos detentados por los jueces, Cargos venales, Carrera judicial, Cátedras, caudillismo, Causa escolástico-jesuítica, Polarización de las elites, Censos a favor de conventos o monasterios, Censura en las transmisiones telegráficas, Censura telegráfica, Censura y auto-censura, cesarismo, Cesión de créditos, Chantajes en el periodismo, Ciclos comerciales, Ciclos comerciales, Voluntad de contraer censos, Cimarronaje, Circuitos mercantiles de un entrepôt colonial, Círculo de parientes, Circunstancias ecológicas, Ciudades alejadas de las rutas comerciales, Clanes familiares ligados a la encomienda, Clanes políticos, Clero regular, Clero secular del interior, Clivajes ideológicos (escolásticos-humanistas-iluministas), Coaliciones clandestinas, Esclavos prófugos, Padrinos criollos, Coartadas o artimañas burocráticas, colaboracionismo anti-militar, Colapso del entrepôt mercantil, Lucha en el hinterland contra el monopolio comercial, Colapso económico, Ruptura del sistema colonial-mercantilista, Colapso imperial, restauración absolutista, Secesión republicana, Colegio Electoral, Colonial-escolasticismo de los Austrias, colonias indígenas militares, Comandancias de Fronteras, Comandantes, Comandantes de Armas, Comercialización del cuero, Comercio de los Navíos de Registro, comercio ilegal de armamento, Comicio como encrucijada bélica, comité revolucionario de soldados, Comparaciones internas y externas, Emulación con el pasado, Competencia por los recursos laborales, Competitividad inter-oligárquica, complicidad de colonos, Cesiones de crédito, Comportamientos frente a las prácticas corruptas, Composición étnica de la oficialidad y tropa, compromiso revolucionario, conato sedicioso, Concepto de fuero de nobleza, **¡Error! Marcador no definido.** Conciliación o tregua entre fracciones oligárquicas, Condición de extranjero, Condición social de plebeyo, conducción autoritaria o democrática, Conductor del Situado, Conexión militar, confesión in Artículo Mortis, confinamiento des-etnizador, Conflictividad eclesial, Conflictividad externa, Cuestión sucesoria presidencial, Conflictividad interna, Conflictividad externa, Conflicto de clase, Conflicto de poderes, Conflictos entre clanes, Conflictos entre el clero secular, Conflictos entre el clero y el estado, Conflictos entre los Comandantes de Armas y la burocracia subordinada (Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias), conflictos intra-tribales, Conflictos provinciales, Conflictos sobre etiqueta, Ceremonial en actos religiosos, Conflictos, guerras y acuerdos políticos, confusión de fuego amigo, confusión identitaria, conquista territorial, Consejo Verbal de Guerra, Reclutamiento y promoción, conspiracionismo cívico-militar, Consulado de Comercio, Consumo de mano de obra, Contagio de la crisis colonial, Continuidad nepótica, Contrabando o desdoblamiento del orden legal, Contradicción entre terratenientes y burguesía comercial, Contradicciones entre el fuero militar y el poder político, Contratos de habilitación, Control de la evasión fiscal, Junta de Comerciantes de Potosí, Control de los Situated Reales y de Comercio, Control secular de funciones religiosas, Conventos, Corambre de hacienda alzada, corporalismo, Corporativización de una burocracia subordinada, Correspondencia postal y telegráfica, Corriente migratoria indígena, Corrientes migratorias forzadas, Corrupción administrativa, corrupción militar, cortesanía militar, Cortesías, Cosecheros, Costo de producción, Costos de baja o transporte, Costos de comercialización, crédito bancario, Crédito eclesiástico, credo Prusiano, Cría y tráfico de ganado mular, Crimen político como derivación del régimen oligárquico, Crimen político, Crímenes que "trascendían a los parientes", Criollos de la elite, Criollos plebeyos, Crisis del Azogue, Crisis agraria colonial, Crisis castrense, crisis dinástico-capellánica, Crisis de intercambio, Crisis del enclave minero, Crisis del Estado Confederado, Crisis económica,

Crisis financiera, Crisis militar, Crisis minera colonial, Crisis orgánica, Crisol de razas, Cuadrillas de Vigilantes, Cuarto grado de parentesco, Cuerpos de ejército, Cuestión sucesoria provincial, Cuestiones de ceremonia y protocolo, Cuñadismo militar, Cuotas exógenas o endógenas, Debacle de la elite, Debates acerca de la forma de gobierno, debido proceso, Declaraciones de guerra, Déficits comerciales externos, Densidad demográfica rural, Denuncias poéticas contra la crueldad del poder, dependencia tecnológica, Depósito Correccional de Menores, Derecho a pedir papel de venta, Derecho de representación, Derrumbe del orden absolutista, Desavenencias acerca del Situado, Desburocratización, Descomposición de los pueblos indígenas, Descomposición del Autonomismo, Crimen político, Cultura hispano-criolla, Desequilibrio demográfico, Desequilibrio en la balanza del poder político, Deserción de la tropa, Desestamentalización, Designación de apoderado, Designación, traslado y revocación de los jueces, Desjarretadoras, Despatrimonialización, despotismo ilustrado, Destitución por intervención federal, Destitución por juicio político, Destitución por putsch militar, Desvalorización de las especies monetizadas, Deudores de censos y réditos de capellanías, Diferencia espacial en el valor venal de la tierra, Diferenciación de funciones del estado moderno, Diferenciación salarial, Diferencias estacionales entre regiones, Dilemas de las opciones estratégicas, Diputaciones eclesiásticas, disciplina militar, Discriminación contra pobladores foráneos, Discriminación de los comerciantes entre sí, Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas, Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, discriminación política en las promociones y ascensos, Discriminación racial de la plana mayor de oficiales, disolución y refundición de batallones revolucionarios, disputas de estrategia militar, Disputas entre patricios y peninsulares, Nobleza de sangre, Nobleza adquirida, Distribución de la tierra de frontera, Distribución del agua de riego, Diversidad étnica del Virreinato, División de la clase dominante rural, División de poderes, División del Autonomismo, División en círculos, División en el seno del oficialismo como causa de la crisis, docencia militar-corporativa, Donación de tierras, Dueños de barracas o barraqueros, dueños de obrajes, Economía de enclave, Economía de trueque, Economías comerciales de escala, Economías de enclave, Efemérides religiosas (misas), ejecución sumaria, Instituciones procesales del tanteo y del retracto, Ejércitos de Línea, Elecciones provinciales, Emancipación de indios encomendados, Producción agraria de gran escala, Empastelamiento de imprentas, empleomanía galoneada, enclave nacionalista, encubrimiento militar, Endeudamiento minero, Endogamia capitular, endogamia de la oficialidad, Endogamia mercantil, enemigo interno, enganche, Enseñanza Secundaria, Escalonamiento del poder militar, Escamoteo de la opinión pública, Escarmiento anti-sedicioso, Escasez de Mano de Obra, Escasez de medios de vida en la industria minera, Esclavitud estipendiaria, Esclavitud infantil, Esclavos prófugos, Escribanos, Especulación, ausentismo, Espionaje contra-revolucionario, Espionaje, Estacionalidad de las vaquerías, Estado de descomposición, Estamentos, Estrategia de autodefensa, Chantaje, Estrategia de las elites respecto a miembros de las clases subalternas, Estrategias de desarrollo rural, Estrategias políticas, Estrategias y tácticas insurreccionales, ciclos de expansión y depresión, Ética corporativa, Etiqueta que debía regir los actos universitarios, Etno-centrismo capitular, servicios de república, milicia, judicatura, Evolución del sistema electoral, Excepciones al servicio militar, Excepcionalidad ficticia, Exención del pago de Alcabala, Exenciones al servicio de Milicia, Exogamia capitular, Expansión agropecuaria, Expedición de licencias, Exportaciones legales de plata, Privilegio de exención del servicio de milicia, Extorsión, Extorsiones en los ámbitos de la cultura, Extorsiones y sobornos en la conducción de caudales de Potosí a Buenos Aires, Extorsiones, Fabricación de sumarios fraguados, Facción ministerial, políticas mercantilistas, Faccionalización de la política provincial,

Facciones de la coalición oficialista, Factores de movilización de energía campesina, Facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, Fase del refinado, Fase extractiva en la industria minera colonial, Fases del contrabando, Favoritismo militar, Favoritismo, corrupción en la Justicia, Favoritismo, discriminación política, Favoritismos en los espacios del poder, Fenómeno revolucionario, Fijación de pasquines, Filantropía evangelizadora extorsiva, Fisuras entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real, Fluctuaciones cíclicas del comercio, Flujos educativos y culturales, Fondos con que contaban los frailes, Formación de elites financieras, Fracaso conspirativo, Fracaso de la política de Conciliación, Fracaso del Acuerdismo, Fractura militar, Fracturas corporativas y geográficas, Fracturas del caudillismo, el militarismo y el clericalismo, Fracturas fiscales, corrupción de la burocracia colonial, Fracturas geográficas, Fracturas modernas, Fracturas socio-corporativas, Fragmentación de la elite política, Fragmento de estado, Fraude censal, Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros, Fugas de esclavos urbanos, métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización, Fronteras raciales, Frustración del Acuerdo, Fuentes del crédito minero, Fuero federal, Fuero militar como institución de impunidad, Fuero Militar, Fueros capitulares, Fueros judicial o capitular, Fuerzas morales, Fuga de las encomiendas. Fuga esclava, Fundadores de capellanías y primeros patronos, Gabinetes ministeriales, Gangrena en las intervenciones federales, Gauchos matreros, Gelatinización de la sociedad civil, Genealogía de la tragedia, Genocidio de “pueblos sin historia”, Gerencias bancarias, Gestación de un patriciado rural, Gestación de una esfera pública, Gobernadores, Gobernadores Electores, Gobernadores, Gobernadores-adelantados, Gobiernos de familia, Grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga, Grado de generalización del fuero militar, Grietas discursivas y acciones colectivas, Guardias Nacionales, Guerra clánica, Guerra de escaramuzas, Guerras, Guerras de Coalición, guerras de sucesión nacional, guerras de sucesión provincial, Habilitación mercantil, Hegemonía Jesuítica, Hegemonización de un proyecto nacional, Herencia y loteo, Herramientas inmovilizadoras de la elite castrense, vulnerabilidad del estado colonial, Historia dominial de predios rurales, Honor civil, Honor dinástico, Honor familiar, Honor militar, Honor tribal, Identificación catártica con el héroe indígena, Ilegitimidad, Impacto de la alternativa, Impacto de las crisis económicas, Impacto de las guerras, bloqueos militares, Impacto del centralismo, Impacto desestabilizador de la Revolución del 90, Implicancias cuantitativas y cualitativas, Imposición a los cabildos en la elección de autoridades, Impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles, Impunidad facciosa, Incidencia del capital comercial, cisma geográfico, fuero consular, fuero eclesiástico, Incompatibilidades de oficio, Incompatibilidades docentes, Incompatibilidades judiciales, Incompatibilidades militares, Incompatibilidades parlamentarias, Incremento de la inmigración extranjera, Incremento en las rivalidades y guerras civiles, Índice de endogamia, Índices del poder de los dueños de ingenios, Indios yanaconas o libres, Indisciplina castrense, Indisciplina de las Guardias Nacionales, Índole contradictoria de un estado subordinado, industria militar, Infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo, inflación de planta o nómina, Ingerencia del ejército en la política provincial, Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes, Inmigración portuguesa, Institución de la llamada asistencia, Instrumentación de la Banca, Instrumentación de la cátedra, Inteligencia militar interior, Intensidad de las levas o destinos, Intento frustrado de transición política pacífica, Intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada, Intermediarios de poder, Interregno de paz forzada en el inicio de los conflictos provinciales, Interrogatorios policiales, Interrupciones del comercio exterior, Intervención federal, Intervenciones anti-dinásticas, Intervenciones federales, Intervenciones Federales, intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios, Introducción de moneda metálica, Invasiones de un poder en otro, Invernada de

Gobernadores, Juntas Municipales de Temporalidades, juntas revolucionarias, justicia carismática, justicia penal militar, legado napoleónico, Legitimidad, Legitimación carismática, Leva o reclutamiento de reclusos y prisioneros, Licencias para beneficiar yerba, liderazgo militar, liderazgo sedicioso, transiciones y rupturas políticas, Limosnas, 'Limpieza de Sangre', Localismos provinciales, Localización geográfica de la demanda de dinero, Longevidad o abolengo de las capellanías, Lucha contra el monopolio mercantil, Lucha de clanes, Lucha política entre los Consulados, Lucha política, Lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios, Luchas intra-coloniales, Malversación de caudales reales y privados, Manipulación de las guías de aduana, manipulación de militares como fuerza coactiva, pases, destinos y cambios de arma, Mano de obra a destajo, Manumisión esclava, Marco legal de las capellanías, Márgenes de ganancia, Marinería de los barcos, masacres indígenas, masculinización militar, Matriculados en la Real Renta de Tabaco, Matrimonio político, mecanismo corruptor y represivo, Mecanismo de elección de los gerentes, Mecanismos canónicos para contrabalancear el poder de la sociedad política, Mecanismos de defraudación fiscal, Medias lunas, Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, mercadeo de grados y honores, Mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo), Mercadeo inmobiliario rural, Mercadeo inmobiliario urbano, movilidad social, Mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata, Mercado a término del cuero, Mercado de mano de obra esclava, Mercado de tierras rurales, Mercado de trabajo rural, Mercado del cuero, Mercado inmobiliario urbano, Mercado inmueble rural, mercenarismo, Mestizaje, Metanastasis, Métodos de reclutamiento y promoción militar, Migración indígena, Migración interna, militarismo, militarización prusiana, militarización, Miscegenación entre blancos e indios, misión civilizatoria, Mita, Tributo, Yanaconazgo, Mito de la docilidad esclava, mitos fundacionales, Modernidad mercantil-absolutista, Modernidad republicana traicionada, drama del pretorianismo, Molienda de mineral, Monasterios, Monetización de los frutos de la tierra, Monopolio azoguero, Monopolio de la oferta de carne, Mordedores y zánganos, motín militar, Motivaciones del putsch y del crimen, Movilidad eclesial, Movilidad económica y social, Movilidad y persistencia en la propiedad rural, Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, Naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, Naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen, Navíos de registro, incompatibilidades de sangre en las provincias, Nepotismo militar, Nepotización, Neutralidad política de los gobernadores, Nivel de vida de los curas, Niveles de participación político-electoral, Noción de orden público en materia religiosa, plebe, representación, elección, mayoría y voluntad popular, soberanía municipal, Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, Nuevo bloque histórico, capellanías colacionadas, obediencia pasiva o reflexiva, Oblaciones, Oferta de nuevas tierras, Oficiales Reales, Oficios infamantes, Olas de migración externa e interna, oligarquía Autonomista, omisión del derecho de defensa, operaciones de inteligencia militar, Oposición a reducir las tasas de interés, orden burocrático, orden cesarista, orden consensual de frontera, orden democrático condicionado, orden institucional, orden interno contra-insurgente, orden oligárquico, orden patrimonial, orden populista, orden predatorio, Orden señorial, Orden estamental, Ordenes Terceras o Terciarias, Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero, Oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante, Otorgamiento de licencias, Otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, actos de corrupción, Pactos o concordias, Parcialidades capitulares, Parentesco, compadrazgo y amistad entre bandoleros, Paridad entre el peso hueco y el metálico, Partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio, Patriarcalismo, Patriciados coloniales, Patrimonialismo, Patrimonialización de una administración venal, Patrones de inversión individual de tierra, patrones militaristas, Pautas hereditarias de primogenitura y varonía, paz armada, pedagogía claustral, pena de muerte, Penuria de agua, azogue y

mano de obra, Peonaje por deudas, Pequeña propiedad rural, Periodismo en las provincias, periodismo revolucionario, Período lanero, Períodos de guerra, Períodos de paz, Perpetuación de oligarquías, Persecución, Persistencia de la fractura geográfica, Persistencia en el dominio urbano, pesquisa policial, Plazos de amortización en las manumisiones, Plazos de redención y renovación de los censos, Pluralidades capitulares, poblaciones originarias, poder condicionado, Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes, Poder de una burocracia colonialista subordinada, Poder político colonial-absolutista, Poder político subordinado, Poesía en clave de contrapunto. Protesta pública o acción colectiva, Política de confiscación de tierras, Política de reforma rural, porfirismo, potenciación de la represión, Práctica del derecho de representación, Práctica exacerbada del federalismo, Prácticas burocráticas nepóticas, Prácticas corruptas en el periodismo, Prácticas inhumanas, Prácticas vitalicias y nepóticas, Precios de la tierra en las ventas públicas, Prejuicios de nobleza de los criollos, Prejuicios de nobleza de los peninsulares, Prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia, Premio de la moneda doble, Presencia de gratificaciones, regalías, o propinas, Presencia de militares peninsulares, Presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia, Presiones crediticias eclesiásticas, pretorianismo absolutista, pretorianismo antiguo, pretorianismo árbitro, pretorianismo aristocrático u oligárquico, pretorianismo colonial, pretorianismo colonizador Habsburgo, pretorianismo directo, pretorianismo explícito, pretorianismo moderno, pretorianismo neo-colonial, pretorianismo parlamentario, pretorianismo plebeyo o de masas, pretorianismo potencial o latente, pretorianismo radical, pretorianismo recolonizador Borbónico, pretorianismo tácito o indirecto, pretorianismo, prevaricación o simonía militar, Primicias, Principales fuentes de conflicto, Privilegios nobiliarios, Privilegios, Proceso de decadencia de las reducciones indígenas, proceso secularizador del conocimiento, Producción de ganado en gran escala, Profesionalización del ejército, Programación de cobros, plazos y renovaciones, progreso tecnológico, Prolongación de la fuga en el tiempo, Propiedad inmueble urbana, Provincialías, Provisión de bastimentos a los estancieros, Provisión de bastimentos, Provisión de Corregimientos de Indios, Provisión de obispados, Provisiones de las vaquerías, mineros independientes, Pueblos de Indios, Pugnas electorales, crisis de la hegemonía patrimonial, putsch en el interior como detonador de la Revolución del 90, putschs cívico-militares, Quiebra de la banca privada, Radicalismo, Ramo de Sisa, Rancherías, acopiadores, Rangos, reacción cívica, reaccionario, Real Consulado, Real Renta de Tabaco, Rebeliones liberales, Rebeliones, Recaudación del diezmo, Recaudación del Ramo de Tributos, Recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala, Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento Europeo, Receptores de la Sisa y la Alcabala, reclutamiento militar, Reclutamiento y promoción dentro del clero regular, Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica, Reclutamiento y selección de destinos y promociones, Rectorados de los Colegios Nacionales, Recusaciones capitulares, Redes ferroviarias, Redes telegráficas, Réditos o intereses de censos y capellanías, Reformismo Ilustrado (Borbónico), Régimen bancario, Régimen capellánico, régimen de internado, Régimen de levass en la milicia, Régimen de personeros, Régimen de vínculos familiares cruzados, Régimen del derecho de abolengo, Régimen electoral, Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos, Región de frontera, Regiones subsidiarias, Reglamentación de la marca y la contramarca, Reincidencia del esclavo en la fuga, remezones conspirativos, Reminiscencias de la política colonial, Reminiscencias estamentales en el régimen electoral, Renta de Correos, Renta de Tabaco y Naipes, Renta de Tributos, Reparto de curatos y doctrinas, Reparto de mercancías en la Milicia, Reparto forzoso de mercancías, presiones mercantiles, Repaso, represalia pretoriana o contra-revolucionaria, Requisitorias de intervención federal, reserva de violencia disuasoria, Resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real,

Resistencia al Acuerdo, Resistencia al putsch, resistencia de sublevados, Resistencia rutinaria y cotidiana, Respeto a la jurisdicción y la inamovilidad de los jueces, respetuoso trato de prisioneros, Restauración escolástico-absolutista, Restricciones extra-económicas, Resultados del régimen de enfiteusis, Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial, Revisitas Indígenas, Revocación de jueces, revolución, Rigidez de los códigos disciplinarios existentes, Rituales de honor, etiqueta o representación capitular, Rol del crédito mercantil, Rol del parentesco, Rol 'Piamontés', Rol político de un censo demográfico, Rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de indefensos, Rotación sufrida por cada esclavo en forma individual, Rotación sufrida por cada predio, Ruina del fisco, deslegitimación del orden patrimonial, Ruptura del Acuerdo, Ruptura del equilibrio político, Satirizando la hidalguía presumida, Secuelas de la corrupción bancaria, secuelas del Consejo de Guerra, Secuelas del crimen político, Sedición permanente, sediciones, Segregacionismo en la educación secundaria, Segregacionismo, señores de la guerra, Seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga, Servicio de los acopiadores, sexualidad militar, Simulacro de golpe de estado, Sisa y Propios, Sistema de frenos y contrapesos, Situado de Potosí, Sobre-valorización de la mano de obra esclava, Sobre-valorización inmobiliaria urbana, Sociedad anfitriona, Sociedad jerarquizada y fragmentada, sodomización compulsiva, solvencia, Subalternización de los originarios, Subasta de tierras jesuíticas, Subdesarrollo de la agricultura, Subrogación de facultades y prerrogativas de Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias, Sucesión de los beneficios, Sucesión provincial, Sueldos de la Milicia, suicidios inducidos, suicidios románticos, Sujeción de unas provincias a otras, Superposición de competencias, Sustitutos, escuderos o personeros, Symmakhia, Tachas capitulares, Talasocracia, Telurocracia, Tamaño de los bienes raíces rurales, Tambos, taxonomías socio-históricas, taxonomías, Tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública, tenentismo--tribus indígenas, Tasas de interés, Tercer intervención federal, tierras públicas, Tráfico pecuario, Transición discontinua, Trasiego cultural, Traslado de jueces, Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas, Tratos con Curas, Tribunal de Cuentas, Unión de los intereses terratenientes, Urbanizaciones forzadas, Usufructo del fuero militar, Valorización de tierras, casas y brazos, Vaquerías, Vecino, Velocidad de rotación del circulante, Venalidad de los grados militares, Venalidad de los oficios capitulares, Venalidad en el régimen electoral, Venta de cargos, Ventas de tierras, Vicariatos, Vinculación de encomenderos con empresarios, Vinculaciones entre la telegrafía y el periodismo, Vínculos del parentesco, Violencia comicial, violencia contra-insurgente, Violencia electoral, Virreyes, gobernadores, corregidores, oidores, Voluntad de fundar capellanías y patrimonios, Voto pasivo, vulnerabilidad militar, Yernocracia militar,

## **Agradecimientos**

En un comienzo ayudaron en la construcción de esta obra: en el Archivo General de la Nación, desde los mismos inicios de esta investigación a partir de 1966 hasta 1977: los funcionarios y empleados Sara Bernard, María Olivan de Di Lauro, Concepción Santana de Horrisberger, Diana Borlenghi de Mira, Adriana del Agua de Huter, y María Marta Barrera, y luego de 1984 Esther González y Liliana Crespi. Quiero además recordar a la recepcionista Nélida Beatriz Gallardo y a los ordenanzas del Archivo que me ayudaron durante años a trasladar centenares y miles de legajos y

protocolos entre quienes debo destacar a Sebastián Sánchez, Gregorio Leguizamón, Nicolás Cabrera, Armando D'Agostino, José Pascual Broña y el finado Pedro Aceto.

En el Archivo de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas en La Plata, a José María Prado y José Thiel, quienes durante años fueron fieles colaboradores de la investigación histórica. En la Universidad Torcuato Di Tella colaboraron desinteresadamente Mabel Villegas y Stella De Gregorio; en ICANA: Cecilia Holmsburg; en la Academia Nacional de la Historia: Violeta Antinarelli, Gabriel Lerman y Ariel Otero; en el Centro de Investigaciones Antropológicas y Filosóficas (CIAFIC): Marinela Noriega; en la Universidad de San Andres: Moira Guppy; en el CAICYT: Lilia Ottolenghi y Mónica Klibansky; en el Banco Central: Marta Gutiérrez de Platero; así como al personal del archivo de la Iglesia Mormónica, y a Luis y Alberto Lacueva de la librería Platero, Pablo Pazos de la librería Guadalquivir, y el staff de las librerías: Norte, Ghandi, Prometeo, y Paidós. Debo finalmente señalar que por la desidia e incuria de las actuales autoridades del Archivo General de la Nación (AGN) muchos de los protocolos notariales se han dañado en forma irreparable (aparentemente debido a un anegamiento), al extremo de habersélos retirado de la consulta sin explicación pública alguna.

Posteriormente, los trabajos más recientes los debo a la generosa actitud del Jefe y del personal del Archivo General del Ejército, y de los funcionarios del Departamento Patrimonio Histórico del Colegio Militar de la Nación, de las Hemerotecas de las Bibliotecas Nacional, del Museo Mitre, del Congreso de la Nación, del CEDINCI y del CEHIPE (Parque España), y de las Bibliotecas del Círculo Militar, de la Academia Nacional de la Historia y del Estado Mayor General del Ejército. Asimismo debo agradecer al Dr. Alejandro O'Donnell el acceso a su archivo familiar, al cual accedí merced a la generosa conexión de su hermano Guillermo O'Donnell..

En el Archivo General del Ejército (AGE) debo agradecer al Coronel Mario Jorge Desimoni, al Suboficial Mayor Rubén Guillermo Oliver, al Mayor Sergio Ríos Ereñú, al empleado Juan Chanquía, y en especial a César Chere, por el ingente esfuerzo y entusiasmo desplegado en localizar, trasladar y reubicar los numerosos legajos consultados. Debo destacar que en el transcurso de mi trabajo en dicho Archivo conté siempre con una absoluta libertad de acción, que pude desplegar sin cortapisa alguna, contrariamente a lo que uno podría imaginar si se guiara con los estereotipos vigentes. En el Colegio Militar debo señalar el apoyo recibido de parte del Director de la Biblioteca José Luis Maríncola, del Secretario de Extensión Universitaria Teniente Coronel Javier Marturet y de la funcionaria del Departamento Patrimonio Histórico Silvia Idonia; y especialmente del Lic. Carlos Pesado Palmieri, quien fue de una ayuda generosa e inestimable.

En la Biblioteca del Círculo Militar recibí la ayuda de las bibliotecarias Julia Elena García y María Rosa Mariano. En el Servicio Histórico del Ejército a su Director el Coronel Fabián Brown. En el servicio de reprografía microfilmica de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional recibí la colaboración de María García Vinent y el viejo amigo Moisés Víctor Amón, y en la del Congreso la de Francisco Romeo, Patricia Salvador, Susana Milito, Sandra Gargaglione y Roberto Recúpero. En el CEDINCI, Gabriel Lerman contribuyó a procesar la información de los microfilms de periódicos de izquierda. Y en el Centro de Estudios Históricos Parque de España (Rosario), debo mencionar la colaboración prestada por el operador informático Julián Gómez, quien

procesó los ejemplares del periódico *El Municipio*, tarea consistente en escanearlos, renombrar los archivos con las fechas respectivas, perfilar en lote todos los archivos (definir el umbral y resaltar y destacar los bordes), cambiar el formato de TIF a JPG, y grabarlos en CD.

También debo señalar la entusiasta colaboración de mi mujer María Cristina Mendilaharsu y de colegas y amigos que me han asesorado con bibliografía, documentación y reflexiones, como José González Ledo, Joaquín E. Meabe, Carmen Sesto, Ricardo Salvatore, Juan Méndez Avellaneda, Charles Tobal, Guillermo Wilde, Marta Ainsztein, Juan A. Fazio, Tomás Vallée (h), Enrique Peruzzotti, Julio Carranza Torres, Arnaldo Cunietti-Ferrando, María Inés Rodríguez, Juan José Rosenberg y Marta Gutiérrez. Especial mención debo hacer de José González Ledo, quien colaboró con un decisivo capítulo, y quien originalmente fue el que me advirtió de la relevancia del Archivo del Ejército; así como Joaquín Meabe, quien ha sido el que más incidió y colaboró en la elaboración de esta obra, y a quien debo la exploración en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. A Norma Raimondo y Angélica Radrizzani les debo la gran ayuda que me prestaron en materia de software. Asimismo, cabe agradecer a los hermanos Alejandro y Pablo Szvalb, de la Librería Opier (Palermo), sin cuya ingente labor de fotocopiado de sucesivos borradores, y del correspondiente anillado de la documentación fotocopiada en el Archivo General del Ejército esta obra no habría tenido lugar. Y, por último en orden cronológico, a Federico Fernández Burzaco y su empresa Papyros Digitales, quien puso de sí todo su empeño y entusiasmo para que esta obra pudiera ser consultada a escala global.

### ***Prólogo de Joaquín E. Meabe***

#### **Historia, auto-representación del orden social y dominación como nueva matriz compleja del relato histórico.**

La notable variedad de registros que han quedado fuera del discurso histórico argentino no deja de sorprender al investigador que se ocupa de nuestro pasado dando lugar, a veces, a controversias que imponen averiguaciones en las que, de ordinario, se tiende a la excedencia, llevando el asunto más allá del ámbito estricto de la propia disciplina.

El asunto, desde luego, no es sencillo porque la novedad no siempre se origina en dificultades heurísticas, insuficiencias e inexactitudes fácticas. Lo que no ha sido registrado o lo que no se ha percibido como dato está inevitablemente sujeto a dispositivos cuya complejidad e importancia se determinan en el contexto, en el que, sin duda, se inscribe la secuencia de acontecimientos dejados al margen o simplemente ignorados por los estándares del discurso histórico establecido. Durante el predominio de la historiografía de *scriptores*, propia de la etapa positivista que predominó a lo largo de los siglos XIX y XX en el mundo occidental, estas cuestiones no se consideraban o, eventualmente, se las tenía como algo externo a la historia misma o como cuestiones de hermenéutica o, incluso, de ideología. La impronta antagónica del historicismo, que antes de la segunda guerra mundial aun despertaba expectativas en Meinecke, tampoco ha escapado a esa suerte de cepo teórico circunscrito a la *res gestae* que sirve de excusa para el discurso hecho a la medida de los estándares establecidos y de los consecuentes programas justificatorios, luego transformado en discurso en torno a

aquellas secciones del pasado que se han privilegiado y se imponen como sucesos susceptibles de interrogación y respuesta.

Dentro de ese horizonte de constreñidas contingencias demasiadas cosas quedan, sin embargo, fuera de lo que suele denominarse, no sin cierta trivialidad, *actos de seres humanos que han sido realizados en el pasado*, y entre lo que queda fuera – y que de ordinario ni siquiera se sabe que queda fuera, como le ocurría a Alcibiades que, de acuerdo a lo que nos cuenta el Sócrates platónico, ni siquiera sabía que no sabía - se encuentra todo ese inmenso substrato que la genealogía, sobre todo a partir de la obra de Michel Foucault, ha sacado a la luz y que solo resulta determinable luego de un complejo reordenamiento contextual de registros, ideas, valores, artefactos y conductas, que forma una formidable telaraña, irreductible a las uniformidades en las que se agrega el colectivo del discurso que acumula individuos y objetos como los actuarios acostumbrados a inventariar por origen o materia. La genealogía a la que aquí se hace referencia y que se asocia críticamente al horizonte teórico de Foucault, comprende tanto el estudio de los sistemas de pensamiento que se materializan en dispositivos luego interiorizados por los sujetos históricos, como las propias contingencias que, sucesivamente, se tejen y articulan como una segunda naturaleza dentro de la vida material, en la que a su vez se reversan los contenidos de registros, ideas, valores, artefactos y conductas que sostiene a lo largo del tiempo el conjunto del edificio social, mostrando así la contra-cara de los sistemas de pensamiento.

La tendencia doxográfica de la historiografía de *scriptores*, vicaria del modelo legado a la posteridad por Heródoto, a la que esta orientación ha canonizado como el padre de la historia,<sup>1</sup> confunde por lo general ambos planos y a causa de ello no suele encontrar en el testimonio otra cosa que no sea la literalidad del registro, dando así al discurso histórico la forma de una reproducción iterativa o de una escenificación sucesiva formada por series cronológicas acotadas de acontecimientos tal como se observa en todas aquellas obras que siguen el modelo de Heródoto en detrimento de la reconstrucción causal que ofrece el modelo de Tucídides.<sup>2</sup>

Un desplazamiento hacia las particularidades, como ocurre con la historia cuantitativa o la microhistoria no modifica este cuadro de los últimos dos siglos que, en nuestro país, ha producido una sobreabundante literatura que, sin embargo, aun no ha podido dar cuenta, salvo contadas excepciones, del conjunto de conexiones entre los sucesos del pasado y los del presente fijando un horizonte de inteligibilidad más allá de las diferencias propias de cada punto de vista. Y una de esas extraordinarias excepciones es justamente el extenso tratado del autor, de la que procede esta nueva obra, titulado *Un debate histórico inconcluso en América Latina (1600-2000). Cuatro siglos de lucha en el espacio colonial peruano y rioplatense y en la argentina moderna y contemporánea*.<sup>3</sup>

Continuación de dicha obra es este nuevo trabajo, en el que se reordenan los materiales y se reexamina la genealogía de la tragedia argentina entre 1600 y 1900 destacando la peculiaridad de las sucesivas etapas que forman el curso evolutivo de aquel conglomerado socio-territorial que luego va a formar la Nación Argentina y el Estado Nacional institucionalizado en 1861-62. La compleja gama de articulaciones interactivas el autor examina con detenido detalle y escrupulosa objetividad, de modo tal que se puede seguir, en su preciso y desglosado relato, el orden de secuencia de los sucesos y, al mismo tiempo, el complejo dispositivo del imaginario social donde se incubó el huevo de la serpiente que luego, tras un siglo y medio de continua e ingente

predación y recurrente ansiedad de muerte, holgazanería y oportunismo, sirvió para ejecutar toda una ingente variedad de simulacros ideológicos en el marco de un continuo estado de excepción en el sentido propuesto por Giorgio Agamben.

La investigación del autor ofrece información suficiente y estremecedora que, en la Argentina, ha estado totalmente fuera de agenda en los estudios históricos a lo largo del siglo XX e, incluso hoy, continúa fuera de agenda en esta primera década del nuevo siglo XXI. El novedoso abordaje del autor rastrea los orígenes de la violencia institucional y la progresiva articulación de los dispositivos en los que juega un rol decisivo el modelo de interiorización tutorial del poder que se edifica bajo una notable pluralidad de formas, en un complejo proceso marcado por el antagonismo, la fractura de los agregados institucionales, la violencia y el desajuste entre las ideas y las expectativas en el interior de un orden social auto-representado cuya plataforma es, por primera vez, investigado y expuesto de manera sistemática.

La controversia sobre la auto-representación del orden social es por otra parte toda una novedad en la historia y en la filosofía y la ciencia política actual. Esta nueva matriz, incorporada por primera vez en la Argentina por Eduardo R. Saguier, procede de las investigaciones desarrolladas por Eric Voegelin en su exilio estadounidense y fueron difundidas inicialmente por éste a partir en sus conferencias acerca de *The New Science of Politics*, expuestas en la Universidad de Chicago en 1951 y publicadas al año siguiente.<sup>4</sup> A partir de esta nueva matriz el autor se orienta, antes que a discutir la posible diversidad de caracterizaciones teóricas, a investigar, registrar y poner de manifiesto la intrincada telaraña de relaciones, programas y vínculos interactivos que sirven de soporte a la genealogía de la violencia tutorial que se extiende a lo largo de cuatro siglos en los diversos escenarios socio-territoriales que convergen en las formaciones institucionales que se derivan de estos y en los que operan los dispositivos de auto-representación social que informan los diversos desempeños de los individuos históricos.

Esta es justamente la labor histórica que reclama el conjunto de asuntos que informa esa trama y el autor es conciente de la necesidad de ofrecerlos dentro de un contexto que los torne inteligibles del mismo modo que Tucídides nos ofrece la información indispensable, aunque quizá nunca suficiente, para tornar inteligible el conflicto de Epidamno que precede a la ulterior Guerra del Peloponeso. Tucídides que aun no dependía de *scriptores* pudo conectar el testimonio con la compleja trama de predación y violencia guerrera dejando así el paradigma que luego Max Weber destacará como uno de los rasgos fundamentales de la racionalidad occidental.

Eduardo R. Saguier, estrictamente tucididiano en ese punto, introduce este paradigma en nuestro discurso histórico y lo combina con la matriz propuesta por Eric Voegelin, sirviéndose de ambos para reformular el cuadro germinal de la violencia, mostrando así las conexiones causales y las auto-representaciones sociales que informan la genealogía que se esconde bajo los pliegues de los agregados y de los dispositivos institucionales que, para las etiquetas y los esquemas de la doxografía histórica local se han quedado hasta ahora escondidos o marginados en un mar de anécdotas más propias del periodismo que de la historia en sentido estricto.

Estos nuevos registros que Saguier saca a la luz e inserta en el discurso histórico argentino, inevitablemente llevan a un necesario cambio, en el que se impone

reformular la periodización de nuestra historia para tornar inteligible las secuencias precedentes y ulteriores a la etapa aquí estudiada. En ese punto lo más importante es la demarcación contextual que toma como factor crucial la dominación en el sentido weberiano y la organización de la sociedad bajo un dispositivo de auto-representación ordenada e interiorizada de cara a la diversidad de tratos y a la variedad de modalidades del uso de las articulaciones.

En ese contexto ni la soberanía como tampoco la representación, o lo relativo a la composición y origen del gobierno o, incluso, las ideologías, constituyen factores que explican de manera suficiente los fenómenos de disolución, colapso y violencia en la etapa germinal del Estado Nacional Argentino. Y lo mismo sucede en etapas anteriores en el seno del territorio luego reformulado y re-institucionalizado como Estado nacional. Tampoco el colapso del orden colonial español en el Río de la Plata a partir de 1808 y, desde luego, en el resto de América, sirven por sí solos para explicar el complejo proceso de guerra civil y guerra social (1808-52) que en estos territorios rioplatenses dieron lugar a la formación de una amplia y desigual variedad de *staatsfragmete*.<sup>5</sup> En estos estados imperan, en reemplazo de la dominación tradicional de tipo monárquico, impuesta por la Corona Española, distintas formas de dominación carismática edificadas, luego de la etapa inicial de deslegitimación y revocación gubernamental (1808-1813), en el predominio de autoridades personales o de grupos adscriptivos respetados y obedecidos por el control de contingentes armados sujetos a la autoridad personal o del grupo del que depende la obediencia que, a su vez, fija las pautas de ejecución de los deberes y de inteligencia y aplicación de las reglas jurídicas y de los demás tratos sociales, económicos, políticos y militares.

Para una adecuada comprensión de este crucial asunto que modifica la cronología tradicional y la reemplaza por una periodización sustantiva conviene seguramente desglosar la secuencia en el ámbito diacrónico del Río de la Plata en al menos tres etapas (1492-1808, 1808-1852 y 1852-2005) con arreglo a los tres tipos de dominación propuestas por Max Weber.<sup>6</sup> Tomando de este modo la dominación como factor demarcativo, en estos territorios del Río de la Plata, luego transformados en estados nacionales (Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia), podemos partir de una dominación tradicional desde el descubrimiento de América y hasta la disolución de la Monarquía por obra de la invasión napoleónica (1492-1808). Luego de la disolución institucional el fenómeno de la Guerra de la Independencia en la Península, transformada en Guerra Civil en América y después en desmembramiento y desaparición del antiguo imperio, abre paso a una nueva forma de dominación en los territorios del Río de la Plata edificada sobre el carisma de los caudillos y de los jefes militares a los que se asocian o se enfrentan las nuevas individualidades aún huérfanas de poder y hasta de asiento en las también nuevas y desordenadas estructuras. Estas nuevas estructuras preanuncian la futura sociedad civil económica, edificada en torno al comercio individual, al mercado y a la monetización de las relaciones de apropiación e intercambio, entre sujetos voluntariamente segregados de cualquier entorno adscriptivo, familiar o fideista y por ende libres para transar, cambiar, adquirir y acumular. Esta nueva forma de dominación abarca en el Río de la Plata desde 1808 y hasta 1852, aunque quizá deba extenderse hasta el fin de la Guerra del Paraguay en el caso puntual de ese país.

El proceso metanastásico<sup>7</sup> iniciado en 1808 marcará la impronta de la descomposición socio-institucional que entierra definitivamente, a lo largo de del segmento que va de 1808 a 1820, la vieja auto-representación del orden social monárquico sustentado con

desigual solvencia a lo largo de toda la etapa colonial. La ulterior reformulación que permite una nueva auto-representación del orden social trabajosamente edificado en el mismo periodo reclamaba un examen de detalle de sus registros históricos como lo hace aquí el autor. Y sea cual fuere la opinión de los críticos acerca de este nuevo escenario histórico, lo cierto es que ya no parece posible, luego de esta monumental contribución de Saguier, que se insista con la agobiante y agotada controversia acerca de factores puntuales como el económico, el político, el militar, el religioso o el adscriptivo.

Los elementos carismáticos y las figuras asociadas a esos rasgos lo mismo que la desigual influencia de los diversos factores no van a desaparecer; pero como cada uno de estos elementos, segregados del conjunto resulta insuficientes para tornar inteligible la secuencia histórica lo que se impone es la reconstrucción del dispositivo de conjunto, pues lo que sí va a cambiar definitivamente será la matriz misma de la dominación y de la auto-representación del orden social, que desde 1852 se ajustará al tipo de dominación racional-legal cuyo asiento es la Constitución y su desagregada trama de reglas de derecho que permitieron la constitución y el desarrollo de una sociedad civil económica que se transforma en la fuente primaria de poder y el vector de todas las hegemonías.

La dominación y el nuevo orden social reformulado resultante no escapará desde 1852 y hasta el día de hoy a esa matriz determinante de auto-representación y en su seno se desarrollaran todas las peculiaridades y todas las patologías de nuestro orden republicano, sobre todo la violencia tutorial cuyas adscripciones institucionales ya no se solventan en el carisma tradicional asociado a la pertenencia territorial y al eventual control de los *staatsfragmete* en los que se edifican las hegemonías dependientes del colectivo ocasional (la muchedumbre, la montonera, la tropa, etc.).

Manuel Florencio Mantilla es casi con seguridad el que mejor caracteriza la nueva etapa histórica inaugurada por la Constitución de 1853 que es impulsada en Corrientes por el primer gobierno de Pujol: *El militarismo altanero de avances brusco y turbulento fue dominado sin efusión de sangre...su representante más conspicuo, Cáceres, desarmado y depuesto, se guareció bajo la protección de Urquiza, quien más tarde sirvióse de él para promover conflictos fácilmente destruidos...Recobró autoridad y prestigio el poder legal y aunque los embarazos domésticos de otro orden no desaparecieron rápidamente, la situación social y política tomó halagüeño carácter...Las personas, las propiedades, las industrias y el comercio tuvieron el amparo de las leyes. La pasión por los combates cedió al influjo del orden civil, sin anularse empero, la virilidad popular, cualidad saliente revelada por la guerra y transmitida hasta hoy de generación en generación. Corrientes retomó el camino de la vida normal de los pueblos organizados...En relación a la época y a los demás componentes del organismo constitucional fundado, poseía gobierno, población, capital industrial, comercio, sociabilidad de primera línea y un porvenir de esperanzas fundadas.*<sup>8</sup> El párrafo 235 de esta obra de Mantilla sigue siendo el mejor registro sinóptico del estado material de la provincia de Corrientes en 1853 y del cuadro de tendencias en orden a las posibilidades de expansión de la sociedad civil económica. La impronta tucididiana de Mantilla permite percibir la dirección histórica general del segmento histórico y la cesura que se produce entre 1853 y 1855 en el sistema de dominación. En algún detalle, con seguridad, su información puntual va a ser rectificada; pero la dirección histórica a la que se reorientaba el orden social de Corrientes no ha sido hasta ahora modificado y difícilmente lo será en el futuro.

En similar dirección tucididiana el extraordinario aporte que hace Saguier en esta obra permite ver por primera vez los cimientos del edificio social de la violencia institucionalizada en el seno de la trama de dominación en el que se articula la etapa histórica que aun no ha terminado. Por otra parte este estudio es una muestra de ese tipo de trabajos destinados a servir de plataforma para una investigación más amplia sobre las ideologías y los sistemas de pensamiento que dieron un contenido sustantivo al orden de dominación racional-legal, a la auto-representación del orden social y al sistema de legitimidad prebendaria subyacente en nuestro estado de derecho a partir de 1853 que se consolida a lo largo del siglo XIX y que aun hoy conserva aquellos dispositivos examinados por primera vez en detalle por el autor en esta tan inusual como erudita contribución que abre una nueva y prometedora etapa en los estudios históricos argentinos.

## **Capítulo 0**

### **A-I Introducción General de la Obra**

En esta obra aspiramos a develar la diversidad y/o heterogeneidad de una aparente totalidad compleja y multidimensional, estudiando las auto-representaciones y los imaginarios que los actores de los diferentes estamentos, clases sociales y agentes procedentes de diferentes períodos y espacios geográficos (virreinos, gobernaciones, ciudades, provincias, naciones) tuvieron de los órdenes prehispánico, imperial-absolutista y nacional-republicano, relevantes para el estudio del origen de la tragedia que asoló a América Latina a fines del siglo pasado. Asimismo, indagamos la integración de los respectivos períodos y bloques históricos; y las causas y consecuencias de cada fractura o crisis de transición y de legitimidad. Específicamente, indagamos las causales de la metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de una auto-representación y de un imaginario político-cultural, que había acontecido durante la conquista en el siglo XVI, y que volvió a ocurrir a principios del siglo XIX, con sus derivaciones de trágica balcanización y migraciones forzosas individuales y colectivas, así como las diferentes estrategias culturales, políticas, sociales y económicas adoptadas para paliar dichas crisis.

Entre dichas estrategias, analizamos las construcciones ontológicas, los esquemas de relación y la implementación de políticas absolutistas, reformistas y revolucionarias y sus referencias a un todo social complejo, tal como lo plantearan Castoriadis (1983), Morin (1994), Gellner (1998), Subirats (2000), y últimamente Descola (2005).<sup>9</sup> Para entender las causas de las rupturas y transiciones se fueron dando en el tiempo sucesivos paradigmas explicativos, que fueron uno tras otro desahuciados. En un principio, a fines del siglo XIX, se generó un tremendo desengaño con los modelos románticos y positivistas que intentaron comprender el origen de la nacionalidad (Mitre, J. A. García, J. V. González). Luego, a comienzos del siglo XX, bajo la impronta de la teoría de las elites (Pareto, Sorokin), y las teorías cíclicas (Spengler, Toynbee), se gestó una profunda insatisfacción con la tesis de la sucesión de ideas-fuerzas, que en Argentina tuvieron sus epígonos más fieles en Rivarola y Matienzo. Pronto esa frustración se repitió con los análisis dualistas acerca de la contradicción entre supuestos señores feudales (encomenderos) y presuntos siervos o

indios encomendados (Dobb, Baran) cuyos primeros voceros fueron Puiggrós y Astesano; y con la historia funcionalista parsoniana o mertoniana cuyos intérpretes latinoamericanistas fueron Phelan y Perlmutter. La decepción se reiteró con la tesis lineal del derrumbe del feudalismo o pasaje del feudalismo al capitalismo o teoría de la dependencia (Sweezy, Frank), y con las interpretaciones sobre las rivalidades comerciales entre sub-metrópolis coloniales como Bahía, Lima y Buenos Aires (Céspedes del Castillo, Novais) y entre el comercio monopolista y el comercio autónomo (Wedovoy), y cuyos principales heraldos con fuertes deformaciones circulacionistas y derivaciones político-militaristas fueron N. Moreno, M. Peña y Vitale. Más luego, proliferaron sucesivos desencantos con aproximaciones historiográficas que supuestamente venían a corregir las desviaciones del dependentismo pero que recaían en nuevos reduccionismos, tales como las tesis mercado-internistas (Assadourian-Laclau-Garavaglia); las explicaciones etno-históricas sobre el rol del mestizaje y la frontera (Stoler-Andrews); las versiones estructuralistas sobre el desempeño de los clanes familiares (Felstiner, Ramírez-Horton, Balmori); las interpretaciones freudianas sobre el malestar del siglo (Vezzetti, Plotkin); y las descripciones 'estatistas' centradas en las crisis fiscales (Skocpol, Trimberger, Andrien) y en la corrupción de las élites (Pietschmann, Moutoukias). Recientemente, el desaliento por la insuficiencia de los paradigmas contextualistas para aclarar el origen histórico de realidades más trágicas (Skinner; Pocock) contagió la historia intelectual o de las ideas políticas, frecuentada por albaceas locales (Romero, Palti). Y últimamente, la incertidumbre por la ambigüedad de los paradigmas culturalistas (Chartier, Gruzinski) cundió en la historia de las mentalidades (Alberro, Langue) y en la más reciente historia conceptual o *Begriffsgechichte* (Koselleck, Gumbrecht).<sup>10</sup>

Es entonces que toman cuerpo las teorías más actuales, inspiradas en la antropología simbólica de Lévi-Strauss y en la hermenéutica de Gadamer y de Ricoeur,<sup>11</sup> tales como los estudios crítico-legales (Derrida, Bourdieu), la estética de la recepción (Jauss, Bloom), las teorías de la comunicación de Mead y de Habermas, los dispositivos cognitivos colectivos en el sentido maquínico enunciado por Deleuze y Guattari, y muy recientemente la matriz ontológica cuatripartita de Philippe Descola, las que sugieren que los análisis que no prestan consideración al carácter cosmológico de las vivencias, la naturaleza histórica de los relatos historiográficos, y la analogía que estos testimonios poseen con los textos etnológicos, jurídicos y literarios,<sup>12</sup> y que no toman en cuenta el lenguaje, los discursos y el vocabulario en su relación con los contextos y la intención de sus autores y lectores, no pueden explicar como ocurrieron las fracturas, ni como se sucedieron --desde condiciones iniciales-- las diferentes transiciones.<sup>13</sup>

Más aún, la teoría crítica y la filosofía política o nueva ciencia de la política (Strauss, Voegelin), emanadas de la hermenéutica practicada por el citado Gadamer, descontentas con la vieja tesis lineal del progreso de los llamados modernos respecto a los antiguos (Perrault),<sup>14</sup> con la hermenéutica integrativa de Ricoeur,<sup>15</sup> con la tipología diacrónica de Frye (1977),<sup>16</sup> y con la estética de la negatividad de Theodor Adorno,<sup>17</sup> sugieren que la crítica literaria, poética y jurídica que esencializa los géneros historiográficos, artísticos y legales, y no toma en cuenta la constelación de mecanismos causales así como la instancia receptora y la experiencia histórica en la constitución de los significados, así como la relación que guardaron los textos, el lenguaje, los discursos, el vocabulario y los niveles de identificación estética, con los contextos y la intención crítico-política de sus autores y lectores, no puede tampoco interpretar como ocurrieron las fracturas y transiciones, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.<sup>18</sup>

Últimamente, para poder evaluar y comparar las diferencias en las crisis y desplazamientos entre los diferentes órdenes históricos, el antropólogo francés Descola (2005) nos provee --fundado en la noción de etnología que Foucault elabora en el último capítulo de *Las Palabras y las Cosas*, así como en sus propias investigaciones practicada en la larga temporada entre los indios Jívaros (Alta Amazonía Ecuatoriana)-- de un esquema cuatripartito de cuatro ontologías o distribución de propiedades: la animista, la totémica, la analógica y la naturalista, según como se articulaba entre humanos y no-humanos (plantas y animales) la sociedad y la naturaleza.<sup>19</sup> Dicho esquema se funda a su vez en la distinción entre interioridad y fisicalidad, que es la experiencia de sí y del mundo común a todos los hombres en todos los tiempos (la que no es equivalente a la tradicional diferencia entre naturaleza y cultura que habría emergido recién con el renacimiento), y en el conjunto de dispositivos maquínicos teorizados por Deleuze y Guattari. Entre los marcos, procesos o dispositivos cognitivos colectivos maquínicos, Descola distingue aquellos dispositivos que son explícitos de aquellos otros que llama no reflexivos o implícitos. Entre estos últimos, Descola diferencia los que por ser temáticos y por adaptarse a una gran variedad de situaciones los denomina dispositivos integradores, de aquellos otros que por ser muy específicos y amoldarse a circunstancias muy particulares los califica como especializados.<sup>20</sup>

Para esta filosofía política y para la antropología simétrica heredada de la noción de etnología de Foucault hemos de implementar las nociones de orden y de auto-representación social de Voegelin; la constelación de mecanismos causales de Bhaskar (1975); la matriz ontológica cuatripartita y los dispositivos integradores de Descola (2005); las rutas de peregrinación de Benedict Anderson (1993); la apropiación de legitimidad de Jorge Domínguez (1985), y las ecuaciones de transferencia de legitimidad de Guerra (1998); y las teorías neo-sistemistas de la coexistencia de distintos órdenes en un sistema global abierto (Lefort, Castoriadis, Hardt y Negri); y habremos de aplicar en cada uno de los periodos y pasajes históricos la trayectoria de investigación "B" de Marramao (2006), que rastrea retrospectivamente el modelo continental del orden político.<sup>21</sup> También habremos de acudir a las teorías acerca de la secularización o desacralización, la balanza del poder, la correlación de fuerzas, la rotación de las elites, las teorías del nacionalismo, y la inmunización o des-tribalización (Marramao, 1998).

Asimismo, hemos de implementar teorías y categorías más específicas tales como la de los tipos empíricos (Jellinek, 1981); las nociones de talasocracia (dominación con supremacía marítima, escasez de población relativa y abundancia de capital), metanastasis (desorden interno generalizado), telurocracia (dominación con supremacía territorial, abundante población relativa y escasez de capital) y symmakhía (contingente armado no territorial), de Tilly, Winius, Guillorel y Michels, Meabe y Esquivel; la teoría impura del derecho de López-Medina (2004); la vinculación entre carisma y tragedia de Falco (1999); la teoría del caos; los estudios subalternos; la consistencia de los status (Lanski, 1954); y las contradicciones secundarias o crisis intra-elites (Higley, Burton y Field, 1990; y Lachmann, 1990) y las consiguientes desavenencias en los relatos del pasado (Candau, 2001; Rinesi, 2003), como motores de fracturas revolucionarias y de tragedias colectivas. Autores como Guillorel y Michels (1997), recurriendo a Cvijic (1917), asignan a la metanastasis el significado genérico de migración obliterando a juicio de Meabe (2004) el más antiguo significado tucidideano de ruptura o desorden interno generalizado de una auto-representación y un imaginario político-cultural.<sup>22</sup> También aplicamos la teoría acerca de la amenaza social (O'Donnell, 1978), como factor determinante en la modificación de las posiciones relativas y las formas que adoptaron los diversos estados provinciales y

nacionales; así como las nociones de soberanía, estado, metrópoli e imperio --desarrolladas por Hardt y Negri (2002)-- y las teorías acerca de la incredulidad en la legitimidad de las instituciones de la democracia liberal, como motor que alimentaba la restauración de formas de estado pretéritas.<sup>23</sup>

Por último, por comparación y contraste entre los órdenes pre-hispánico, imperial-absolutista y nacional-republicano intentamos identificar, detallar y definir los mecanismos causales y los dispositivos integradores de cada uno de ellos que combinados producen los acontecimientos a explicar, así como las relaciones entre los mismos (el despótico, el cesarista, el escolástico, el barroco, el estamental, el esclavista, el regalista, el patriarcal, el señorial, el nepótico, el prebendarista, el cortesano, el patrimonialista, el patriarcalista, el corporativista, el pretorianista y el mercantilista).<sup>24</sup> Y para analizar la intensidad de las crisis y/o fracturas espirituales, culturales, políticas y sociales de dichos órdenes, investigamos también la consistencia de la identidad y los mitos fundadores, según que fueren antiguos, prehispánicos o modernos.<sup>25</sup> Para ello, hemos evitado a todo trance la utilización de nociones estereotipadas tales como “Antiguo Régimen”, y “pre-modernidad”, por su condición de significantes vacíos y resultar remanidas e inconducentes a los efectos de describir los órdenes prehispánico e imperial-absolutista y sus respectivos derrumbes; así como también la denominación de “indígenas”, la cual ha sido sustituida por la más reparadora de “originarios”.<sup>26</sup> Dichas nociones ahora desechadas, aplicadas a la realidad histórica pre-revolucionaria de América Latina, sugieren la existencia de mundos inmóviles y oscuros propios de continuidades primitivas y monárquicas, así como la carencia de contradicciones, las que ocultaban las hondas diferencias que existieron entre los órdenes prehispánicos andino y litoraleño así como entre los órdenes imperiales habsburgo y borbónico. De igual modo, hemos rehusado utilizar la noción de revolución de independencia así como del sustantivo “modernidad” sin los correspondientes acompañamientos de “absolutista” o “republicana”, según el caso.

La caracterización, categorización, comportamiento y mecanismo de constitución de las identidades territoriales, ideológicas y sociales así como el origen de las tragedias colectivas se discutieron en Europa intensamente al extremo de concluirse que no seguían una dirección unilineal, y que las guerras y genocidios que últimamente la asolaron habrían sido fruto de una larga guerra civil y de un origen histórico que se remontaría a la partición colonialista del Asia y del África en el siglo XIX (Nolte, Traverso), a la masacre de la Gran Guerra (1914-18), y aún más atrás en el tiempo a las guerras de religión que dieron nacimiento al estado moderno en los siglos XVI y XVII (Voegelin, Strauss, Marramao).<sup>27</sup> Si esto es así, el colapso final del orden republicano y con él, el del estado-nación, concebido a escala mundial e incluyendo a la periferia neo-colonial Latinoamericana, habría obedecido entonces a un proceso regresivo de larga duración compuesto por una extensa cadena de acontecimientos históricos relacionados con metanastasis, symmakhías, talasocracias, telurocracias, despotismos y el doble proceso armado o militar de anábasis (ascenso, avance, conquista o guerra ofensiva) y katábasis (descenso, retirada o guerra defensiva).<sup>28</sup> Sería lógico entonces --como lo sugieren Subirats (1994) y Traverso (2006)-- atribuir también el origen remoto de esta decadencia al secular tráfico de esclavos empeñado entre África y América, y a los más remotos episodios tanto de la misma conquista territorial, militar y espiritual de América y su partición entre las metrópolis de la Contra-reforma Europea (España, Portugal), como de la represiva conducta seguida con los moros y los judíos (1492).<sup>29</sup> Podríamos agregar que sería muy lícito asignar también como substrato arcaico los sacrificios humanos practicados durante el orden despótico prehispánico.

En la discusión acerca de la naturaleza política de la periodización, origen, fractura y partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español, y a diferencia de la tradición escolástico-inquisitorial, de la cual estaba impregnada la dinastía de los Austria y la correspondiente colonización Habsburga, las tradiciones iluminista, neoclásica, romántica y positivista imaginaron la irremediable decadencia de monarcas e imperios, y la desestructuración y reestructuración territorial, poblacional y cultural --mediante guerras, particiones, secesiones e ingenierías institucionales-- de nuevas jurisdicciones (virreinos, capitanías generales, gobernaciones-intendencias, provincias, naciones). Ya Sepúlveda, en su polémica con Las Casas, a mediados del siglo XVI, en plena modernidad renacentista, rebrota la idea medieval de imperio universal y preludia los primeros embates teóricos sobre un drama que se habría venido gestando y agravando a lo largo de cuatro siglos.<sup>30</sup> El propio pensamiento renacentista de Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales, del cual se había embebido entre otros Cervantes, Ercilla y Domínguez Camargo, y el posterior pensamiento Ilustrado de Pedro de Peralta y Barnuevo --un admirador del benedictino Benito Jerónimo Feijoo quien a su vez fue un asiduo lector de Bernard Fontenelle y de Pierre Bayle y su correspondiente Dictionnaire Philosophique (1697)-- en sus diversos ensayos, al encarar el problema del imperio español y sus reinos o estados coloniales, argumentan por analogía con la *Utopía* de Tomás Moro su futuro colapso y consecuente fragmentación. Para ello comparan su partición con el derrumbe y fraccionamiento del Imperio Romano y con el cisma de la Iglesia de Roma;<sup>31</sup> analogías garcilasistas que fueron corroboradas por Francisco de Miranda en su entrevista con Edward Gibbon, en 1788, y que luego fueron reiteradas por el mismo Simón Bolívar en su Carta de Jamaica.<sup>32</sup> Dicha Carta es considerada por Subirats (1994) como uno de los momentos álgidos de la Ilustración Europea, ubicado en sus confines geopolíticos.<sup>33</sup>

Los proyectos de república independiente de Moreno, de Monteagudo y Rivadavia, y el de unidad nacional de Mitre y Sarmiento repitieron e imitaron con escaso beneficio de inventario los mitos y modelos de las modernas naciones-estados europeas y norteamericana, las que a su vez habían reproducido los mitos y modelos de la antigüedad griega y romana.<sup>34</sup> Pero la tradición positivista que les siguió no fue unánime en la caracterización de los mundos coloniales y nacionales. Joaquín V. González (1888), fundado en el pensamiento de Alberdi (1856), Quesada (1881), Sarmiento (1883), y Ramos Mexía (1887) --quienes a su vez se hallaban influidos por el genealogismo mítico germanista de Thierry y Guizot, opuesto a la universalidad del romanismo jurídico-- sostenía la tesis fundacional o de la prioridad de las provincias sobre la nación, y añoraba el "republicanismo" colonial Habsburgo, de cuño renacentista, transformado por la modernidad Iluminista y las Reformas Borbónicas y demolido por la Reformas Rivadavianas, al lamentarse que en la Argentina independiente no se hubieran dejado en pie los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, pues ellos, al haber sabido resistir el orden centralista y absolutista de obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro".<sup>35</sup>

Por el contrario, Mitre (1859) y J. A. García (1900),<sup>36</sup> alimentados por las tesis modernas migracionistas o teorías del pacto y la soberanía sostuvieron la prioridad de la nación sobre las provincias, atribuyéndole a la modernidad Iluminista, propia del estado colonial-Borbónico (es decir al Virreinato), el origen de la nacionalidad argentina.<sup>37</sup> Asimismo aludían a la necesidad de una guerra de independencia para construir un estado-nación. Y al referirse a la base social del estado colonial, Mitre y García alegaban que en dichos tiempos, en las provincias del Virreinato del Río de la Plata, existió en los Cabildos

una aristocracia o patriciado (equivalente al estamento de la nobleza, del orden absolutista Europeo), y no una clase media (equivalente a la burguesía), único sostén posible de una república democrática. Para Mitre y García, los Cabildos se oponían al progreso material y se resistían a los objetivos iluministas y republicanos de la Independencia y la Organización Nacional, habiendo sido corporaciones oligárquicas, parodias de los municipios castellanos, abolidos por el orden renacentista-modernizante del absolutismo Habsburgo (Carlos V) luego de la batalla de Villalar.<sup>38</sup>

Si bien en sus comienzos, el legalismo formal de la Nueva Escuela Histórica, con Levene (1911) a la cabeza, compartió dicha tesis; después, y centrándose en el caso porteño, este último autor rebatió dicha postura argumentando que la clase dominante colonial, estaba constituida por comerciantes, y que por tanto no llegó a conformar una verdadera aristocracia o nobleza, propia de un orden absolutista.<sup>39</sup> No obstante, contrariando a Levene, Góngora (1975) y Flores Galindo (1984), en sus estudios sobre Chile y Perú, sugieren que la plutocracia (los comerciantes) de la época colonial, no constituía una burguesía, pues estaba apasionadamente interesada en asimilarse a la nobleza (estamento dominante del orden absolutista), adquiriendo a cualquier precio títulos de nobleza o afiliación a órdenes militares, así como estaba fuertemente entusiasmada por la práctica burocrático-medieval de la limpieza de sangre.<sup>40</sup> El estilo de vida auténticamente "burgués", acuñado por Weber y Sombart, era según Góngora, ajeno a la conciencia colectiva de la clase mercantil.<sup>41</sup>

Más luego, el pensamiento liberal de izquierda, influido por el catastrofismo mecánico de la Teoría del Derrumbe (Lenin), vino a identificar la autoridad colonial con un aparato burocrático expoliador y parasitario (Virrey, Real Audiencia, Consulado, Cabildos, Temporalidades, Renta de Tabaco, Alcaldías de Aguas y de Hermandad) que no era susceptible de ser "usado" por la clase social emergente (la burguesía comercial no monopólica), y que como tal debía ser destruido durante la crisis o fractura revolucionaria, y reemplazado mediante nuevas autoridades (congresos o convenciones constituyentes) con una concepción "ampliada" del estado.<sup>42</sup> Finalmente, así como Monteagudo, Moreno y Rivadavia se pusieron bajo el paraguas de la Ilustración y el Enciclopedismo, Alberdi, Mitre y Sarmiento se pusieron bajo el amparo primero del Romanticismo y luego del Positivismo. Estas ligazones debían formularse teniendo en cuenta no sólo el contenido de clase de dichas crisis y fracturas --por cuanto el estado sería la arena donde se dirime la lucha de clases-- y el impacto acelerador que dichas crisis y fracturas tenían en la circulación de las elites políticas y en la modificación de los bloques históricos, sino también los contenidos culturales y políticos.<sup>43</sup>

Finalmente, el proceso de regresión secular, de larga duración, experimentado por el imperio español --semejante al sufrido por el imperio otomano-- del cual las Capitanías Generales de Chile y Venezuela, y los virreinos del Río de la Plata y Nueva Granada fueron algunos de sus frustrados desprendimientos, se habría iniciado en la corte española de los Habsburgo, donde como se estilaba entonces "no se ponía el sol", con su quijotesco afán de restaurar una "monarquía universal", ilusoriamente heredada del sacro imperio romano-germánico. Este delirio ecuménico se alimentó con sucesivos éxitos militares: la conquista de México y Perú (1536), y las victorias de Pavía contra Francia (1525) y de Lepanto contra los otomanos (1571). Después sufrió sucesivos infortunios: primero con la derrota de la Armada Invencible (1588), más luego con la independencia de Portugal y la Paz de Westfalia (1648), aún más tarde con la cesión de Gibraltar y Menorca y la pérdida de los dominios europeos (Milanesado, Nápoles, Cerdeña, Sicilia y Países Bajos

españoles) en la Paz de Utrecht (1713), a comienzos del siglo XIX con las invasiones napoleónicas (1808), y finalmente con la guerra de 1898, en donde perdió definitivamente Filipinas, Puerto Rico y Cuba.<sup>44</sup> En forma semejante, la denominada revolución de independencia alimentó efímeramente la utopía restauradora de un imperio incaico.

## **0-Plan de la Obra**

Parte de la obra, cuando el autor se hallaba aún dominado por un pensamiento cientificista, se publicó en forma fragmentada y desarticulada, como si se trataran de estudios etnográficos, y recién muchos años después, en 2004 y merced a Internet, se la pudo revisar, integrar y compilar en casi un millar de apartados comprendidos dentro de más de un centenar de capítulos, y a estos últimos se los pudo reagrupar en quince (15) sucesivos tomos. Fiel a dicho pensamiento cientificista dicha compilación siguió un ordenamiento por esferas o subsistemas: cultural, político, militar, eclesiástico, social, y económico. Es entonces, a partir de dicha obra electrónica y de otros trabajos publicados no incluidos en la misma, que nos propusimos --siguiendo las teorías de Bhaskar, Voegelin y Descola y el método weberiano de las afinidades selectivas— re-escribir otra obra totalmente distinta eligiendo y posicionando aquellos capítulos y tomos que creímos más relevantes, pero que siguieran una disposición puramente histórica, aludiendo a la transición acontecida desde un orden prehispánico al orden imperial-absolutista (1600-1800) y de este a un nuevo orden nacional-republicano (1800-1900).

Esta obra, en cinco (5) volúmenes, un centenar de capítulos, y casi tres mil páginas está fundada en multitud de textos de época, relevados en documentación judicial, notarial, administrativa, eclesiástica, periodística y electrónica. El relevamiento de las fuentes documentales fue practicado entre 1967 y 2005 en los protocolos de escribanos de los archivos notariales; en las series judiciales, sucesorias, capitulares, legislativas, y gubernativas; en las actas capitulares y diarios de sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de Senadores, nacionales y provinciales; en las revistas, diarios y periódicos depositados en las hemerotecas de las Bibliotecas Nacional y del Congreso, el Museo Mitre, la Universidad de La Plata y el complejo Parque España (Rosario); en las compilaciones documentales editas y en los epistolarios de los archivos presidenciales y provinciales de los siglos XVII, XVIII, y XIX (Mitre, Paz, Roca, Juárez Celman, y Victorino de la Plaza, del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del Gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha); en los legajos personales del Archivo General del Ejército; en los libros de ordenes y los copiadore de notas del Archivo del Colegio Militar de la Nación; en los Boletines mensuales y Memorias anuales de la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército; en las correspondencias y conferencias telegráficas de gobernadores, ministros y legisladores; depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires, en los Archivos Históricos de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires (La Plata), y en las bibliotecas de las Universidades de Wisconsin y Chicago y del Colegio de México

La obra se halla repartida en cinco (5) volúmenes, relativamente autónomos entre sí; en una veintena de secciones, cada una de ellas con una muy breve introducción; en más de un centenar de capítulos, referidos en los índices en forma correlativa y con un código propio que identifica el tomo y la sección a la cual pertenece cada capítulo; y en centenares

de apartados, entre los cuales casi medio centenar son reseñas historiográficas sobre cada uno de los temas centrales de la obra. Casi medio centenar de dichos capítulos son versiones muy mejoradas de mi tesis doctoral, y de trabajos ya publicados en forma separada en revistas científicas del mundo (entre 1984 y 1999), cuyos ejemplares y separatas se hallan registrados, indizados y reseñados en el Handbook of Latin American Studies (HLAS: Library of Congress), en el Historical Abstracts (Santa Bárbara, California), en el Hispanic American Periodical Index (HAPI, Latin American Center, University of California, Los Angeles), en el Current Index to Journals in Education, y en la Biblioteca Digital de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).

El primer volumen está dedicado a la modernidad renacentista y a la construcción de un orden imperial-absolutista (1580-1713); el segundo a la modernidad iluminista y al derrumbe del orden imperial y crisis del mundo colonial (1713-1808); el tercero a la edificación de un orden nacional-republicano (1808-1912); el cuarto al pretorianismo tutorial de las fuerzas armadas; y el quinto a las perversiones institucionales y al consiguiente fracaso del orden nacional-republicano.

La obra incluye en su comienzo una introducción general, un abstract general, y cuatro tipos de índices por orden de desagregación: de tomos, de secciones, de capítulos y de apartados. En cada sección y tomo se incluyen también una introducción y una conclusión, así como un índice, un abstract, una colección o registro de Palabras-Clave, y una bibliografía para cada tomo. Los abstracts, amén de una síntesis o resumen incluyen la referencia bibliográfica de cada capítulo, con el título, lugar de edición, fecha y paginado de la publicación periódica que dio cabida al contenido del capítulo, así como la referencia de origen del capítulo y tomo de la primera obra. Asimismo, las numerosas tablas, cuadros, apéndices, listados y gráficos están incluidas en el Índice del tomo respectivo, muchas de las cuales por no estar digitalizadas debieron ser escaneadas de la Tesis Doctoral y de artículos publicados en tiempos anteriores a la computadora personal.

## **Tomo I      Violenta subordinación de una población a un orden imperial-absolutista (Río de la Plata-siglos XVII y XVIII).**

### **INDICE del Tomo-I**

#### **Introducción**

- Sección I-A    Trasiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial**
- Sección I-B    Configuración multicultural de un orden jerarquizado, estamental y esclavista**
- Sección I-C    Articulación de un *entrepôt* mercantilista con un *hinterland* minero-rural**
- Sección I-D    Valorización de tierras, casas y brazos.**
- Sección I-E    Potenciación de una economía de enclave**
- Sección I-F    Patrimonialización de una administración venal**
- Sección I-G    Corporativización de un orden burocrático-regalista**
- Sección I-H    Nepotización de un orden colonial-absolutista**

Capítulo I-0: Introducción del Tomo-I	12
---------------------------------------	----

## **Sección I-A Trásiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial**

Capítulo I-A-1: Trásiego cultural y luchas intra-coloniales.	12
---	----

Capítulo I-A-2: Crisis orgánica en el estado colonial americano.	7
---	---

Capítulo I-A-3: Índole contradictoria de un estado subordinado.	11
--	----

## **Sección I-B Configuración multicultural de un orden jerarquizado, estamental y esclavista**

Capítulo I-B-4: Intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada.	15
--	----

Capítulo I-B-5 Gestación de un patriciado rural y rol del comercio y la inmigración.	11
---	----

Capítulo I-B-6 Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial.	19
---	----

Capítulo I-B-7: Subalternización de los originarios como fuerza de trabajo colonial.	17
---	----

## **Sección I-C Articulación de un *entrepôt* mercantilista con un *hinterland* minero-rural**

Capítulo I-C-8 Circuitos mercantiles de un <i>entrepôt</i> colonial	4
--	---

Capítulo I-C-9 Guerra y paz y fases del contrabando	10
--	----

Capítulo I-C-10 Reparto forzoso de mercancías y presiones mercantiles	31
--	----

Capítulo I-C-11 Fluctuaciones cíclicas del comercio y rol del crédito mercantil.	16
---	----

## **Sección I-D Valorización de tierras, casas y brazos.**

Capítulo I-D-12 Mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII).	11
---	----

Capítulo I-D-13	
Mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario	39
Capítulo I-D-14	
Mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo).	15
 <b>Sección I-E    Potenciación de una economía de enclave</b>	
Capítulo I-E-15	
Fase extractiva en la industria minera colonial.	16
Capítulo I-E-16	
Fase del refinado y cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina.	22
Capítulo I-E-17	
Penuria de agua, azogue, y mano de obra en Potosí.	13
Capítulo I-E-18	
Escasez de medios de vida en la industria minera	8
 <b>Sección I-F    Patrimonialización de una administración venal</b>	
Capítulo I-F-19	
Venalidad de los oficios capitulares.	30
Capítulo I-F-20	
Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes	20
Capítulo I-F-21:	
Patrimonialismo en el régimen de personeros y levass de la milicia	22
Capítulo I-F-22	
Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica.	23
Capítulo I-F-23	
Presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social	25
 <b>Sección I-G    Corporativización de un orden burocrático-regalista</b>	
Capítulo I-G-24	
Naturaleza de la burocracia colonial	12
Capítulo I-G-25	

Lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia.	17
---	----

#### Capítulo I-G-26

Contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia subordinada (gobernadores, virreyes y oidores, 1739-1810)	24
---	----

### Sección I-H Nepotización de un orden colonial-absolutista

#### Capítulo I-H-27

Etno-centrismo capitular en ciudades carentes de inmigración (1700-1776)	26
--	----

#### Capítulo I-H-28

Exogamia en los cabildos e inmigración de comerciantes peninsulares (1760-1810)	36
---	----

#### Capítulo I-H-29

Cuotas exógenas o endógenas en las recusaciones capitulares.	11
--	----

### Sección I-I

Capítulo I-I-30	Conclusión	1
-----------------	------------	---

Total de páginas	580
------------------	-----

## Capítulo 0 Introducción del Tomo-I

Los principales exponentes de un pensamiento dualista o marxista (Puiggrós, 1940; Astesano, 1941), aunque influidos por el economicismo positivista (Baran, Dobb), identificaban al cabildo con la comuna feudal, y consecuentemente, al estado colonial con el estado feudal. Consideraban al estado colonial como un aparato que controlaba todas las clases sociales con el orden imperial-absolutista como el principal flagelo, y a la denominada Revolución de Mayo como una revolución burguesa que se proponía un proyecto jacobino dispuesto a liberar a cuanto indio o negro subsistiera como esclavo.

Más luego, los dependentistas (Peña, 1966; Frank, 1967; Spalding, 1974), siguiendo un criterio circulacionista y reduccionista, consideraban al estado colonial como un aparato controlado centralmente por el capital comercial y consecuentemente sobreestimaron el rol jugado por el orden patrimonial (venalidad de los oficios públicos) en las luchas políticas. Esta escuela de pensamiento visualizó al estado colonial como un estado burgués, a los conflictos inter-municipales como luchas inter-capitalistas, y consideraba que la penetración del capital comercial bajo el débil dominio de un orden mercantilista reforzaba un estado corporativo colonial.

Entre aquellos que enfatizan las interpretaciones economicistas como explicación del proceso de formación de la estructura social colonial, las diferencias historiográficas concernientes a la caracterización de la etapa histórica se han centrado

alrededor de la cuestión de cuál nivel económico era capaz de resolver el problema de la periodización. Al decir de Semo (1978) "...los períodos se caracterizan por el hecho de que en ellos se resuelven problemas históricos determinados de importancia fundamental para el desarrollo de una época histórica".<sup>45</sup> Un extremo de este debate historiográfico es el nucleamiento de aquellos investigadores americanistas que recurren fundamentalmente al nivel de la producción como clave para resolver dicho problema metodológico.<sup>46</sup> Una debilidad común a este grupo consiste en desconocer el proceso de satelización o periferalización del *hinterland* por obra del capital comercial. Este grupo no reconoce que subestimar el rol de la circulación, implica una reducción del origen del proceso de periferalización a sólo causas políticas o extra-económicas.

Para este nivel de análisis la clave para caracterizar una etapa histórica debe buscarse o bien en el grado de desarrollo y conformación de las fuerzas productivas, incluida la tasa marginal de sustitución entre los mismos factores de la producción para cada producto, o bien en el grado de divorcio o disolución de la relación de los productores directos (peones o sirvientes) con la tierra y los medios de producción, o bien en el grado de restricción de las actividades de los arrendatarios o aparceros, ya sea al plano de la reproducción simple o al de la reproducción ampliada, o bien, finalmente, en el grado de conflicto o coexistencia entre la economía natural y la economía monetaria. O entre la producción para el mercado y la producción para el uso.

A juicio de Bagú (1949), quien en esto sigue a Mariátegui, el sector externo regional debió su crecimiento durante la conquista y la colonización no a la imposición de relaciones sociales de producción feudales sino, por el contrario, a la instauración de relaciones esclavistas (mita y repartimiento) en la explotación de la fuerza de trabajo, frenando con ello la eventualidad de una transición del indio a la condición de trabajador libre o asalariado. La existencia de un asalariado indígena no implicaba en modo alguno la vigencia de relaciones sociales de producción capitalistas, pues se trataba a todas luces de un salario bastardeado por el endeudamiento, incapaz de atraer mano de obra a menos que fuera expulsada de su lugar de origen por una suerte de migración forzada (Chevalier, 1952; Zavala, 1968). No obstante, para liberales revisionistas como Gibson (1967), Kay (1976, 1977), Katz (1974) y Bauer (1979), las demandas indígenas de crédito como condición para su trabajo no eran, tal como lo sugieren Zavala (1969) y Chevalier (1952), un indicio de servidumbre, mas por el contrario, un testimonio de la ausencia de poder extra-económico por parte de los terratenientes, y de la presencia de un fuerte poder negociador en manos de los indígenas.

Más luego, según Spalding (1974), exponente de la escuela de la dependencia, la principal fuente de obtención de dinero para el indio era la venta de trabajo y el trabajo asalariado. Mas para Reyes Flores (1983), no es la venta de fuerza de trabajo del campesino lo que caracteriza a las relaciones sociales en el Perú colonial, sino todo lo contrario, son las prestaciones en especies y en trabajo las que rigen las relaciones entre la clase campesina y la clase dominante en general. Lo cierto es que los campesinos no "venden" sino que, por el contrario, "pagan" sus deudas con fuerza de trabajo, por cuanto al ser el circulante metálico muy escaso en el Perú colonial, no podían pagar los campesinos sus deudas en dinero.

Sin embargo, de la crítica a las postulaciones dualistas (Puiggrós, Astesano) que afirmaban la naturaleza feudal de las regiones más aisladas, las corrientes

circulacionistas (Peña, 1966; Frank, 1967) derivaron la tesis de que aún las más remotas regiones de América Latina habían estado dominadas por la economía de mercado siendo por ello capitalistas desde el mismo inicio de su colonización. Es por reacción a esta dicotomía que hay quienes afirman que el “pecado original” de la conquista y la colonización ibérica no reside en que ella hubiere sido capitalista, tal como lo sostienen los dependentistas, por haber formado parte del proceso originario de acumulación a escala mundial, ni en que hubiere sido feudal, tal como lo venían sosteniendo las historiografías liberal y dualista o marxista tradicional, sino en que, al decir de Mires (1980), “...ni siquiera fue lo suficientemente feudal como para generar condiciones capaces de evolucionar en términos capitalistas”.

El recurso metodológico del circulacionismo se había originado en la influencia provocada por el pensamiento liberal decimonónico.<sup>47</sup> Este grupo identificaba la América hispana colonial con el orden feudal. Según sus integrantes, el orden feudal era un sinónimo de atraso y de economía cerrada, y el orden capitalista de dinamismo y de progreso. La identificación entre feudalismo y estancamiento también la proyectaban al período posterior a la denominada revolución de independencia. El afán de asociar al orden feudal todo lo más autoritario acontecido en la América Latina los llevó a aquellos autores más propensos a las lecturas de los historiadores románticos, a identificar por analogía el período de la anarquía posterior a la revolución de independencia con el de la Guerra de los Cien años acontecida durante la edad media, y a los dictadores decimonónicos con los reyes feudales que pusieron fin a dichas guerras (Magariños Cervantes, 1854; Estrada, 1877; López, 1896; y Quesada, 1898). La asociación paradigmática del dictador argentino Juan Manuel de Rosas con el rey francés Luis XI es en ese sentido el fruto directo o indirecto de la lectura acrítica de los escritos románticos de Chateaubriand acerca de los orígenes de la nacionalidad francesa.<sup>48</sup> Como Luis XI, quien atajó la oposición interior y exterior (alianza anglo-borgoñona) con una resolución inflexible, utilizando “todos los recursos de su espíritu sutil, de sus retorcidas combinaciones, y de su desvergonzado cinismo”, recuperando patrimonios provinciales, acaparando gobiernos municipales, extorsionando mayores impuestos, y reprimiendo las intrigas aristocráticas; Rosas también frenó la oposición interior y exterior al poder de los terratenientes ganaderos porteños con los recursos de su doblez y espíritu ladino y con el arma del terror, expropiando a sus opositores, premiando con dádivas y sinecuras a sus cómplices y aduladores, bloqueando la libre navegación de los ríos interiores, e impidiendo la organización constitucional de la república.<sup>49</sup>

Como reacción frente a las interpretaciones economicistas y esencialistas, otras corrientes de pensamiento quedaron prendadas por reflexiones sociologistas, antropologistas, demografistas y culturalistas. El centralismo y el orden patrimonial fueron ubicados por autores más recientes como opciones distintas en los mecanismos de concentración del poder político.<sup>50</sup> A diferencia del centralismo que debe encuadrarse en la denominación “racional” de Weber; y el caudillismo que debe concordar con la dominación y legitimación carismática; el patriarcalismo, el clericalismo, el estamentalismo y el patrimonialismo caen --a juicio de Véliz (1984)-- dentro de la categoría Weberiana de “autoridad tradicional”.

La auto-representación y los imaginarios de los diferentes grupos ideológicos, étnicos y sociales, como motores del proceso de formación del orden colonial-absolutista, también sufrieron variantes profundas según a que región geográfica se

refirieran y cual corriente de pensamiento tuvo la responsabilidad de caracterizarlos. Tratándose de las regiones centrales del imperio colonial con alta densidad de población originaria y escasa inmigración europea (México y Perú), el pensamiento liberal e indigenista tiende a reducir el hecho étnico al hecho económico, con el resultado que el indio es visto como el equivalente del campesino (Bonfil Batalla, 1980). Por el contrario, el pensamiento conservador, nacionalista o de la continuidad endógena o territorial tiende a aislar el hecho étnico con una autonomía tan absoluta, que las diferencias económico-sociales en el seno de la masa originaria quedan camufladas por los comunes elementos histórico-populares.

Tratándose de las regiones periféricas del imperio español con baja densidad de población originaria y abundante inmigración europea (Nueva Granada y Río de la Plata) el debate se traslada a las corrientes migratorias y el eje del mismo se desplaza del originario al criollo. Para los liberales los criollos constituían la minoría dominante y los inmigrantes europeos conjuntamente con los negros y las castas la masa oprimida. Sin embargo, para una visión crítica de las minorías étnicas y nacionales, los inmigrantes europeos no constituyeron ni una minoría opresora ni una oprimida, sino una suerte de minoría intermediaria.<sup>51</sup> Elegir al criollo, al negro, al gaucho, al originario, o al inmigrante europeo como núcleo central de la cuestión nacional, en los términos étnicos en que las diversas escuelas de pensamiento histórico los trataban, implica el surgimiento de un vasto repertorio de antagonismos: criollos versus europeos, negros y/o originarios vs. blancos, campo vs. ciudad, puerto vs. interior, federalismo vs. unitarismo. Ello no sólo implica el imperio de una clave racial que subordinaba las claves sociales, culturales, económicas, políticas e históricas; sino también reproducir en todos y cada uno de estos planos de la realidad, el conflicto de la clave “principal”.

Entre los que enfatizaron las interpretaciones antropologistas y sociologistas como explicaciones del proceso de formación de la estructura social colonial, Blank (1972), Ramírez-Horton (1977) y Felstiner (1976) descansaron (forzados por la realidad y la documentación que estudiaron) en una red fundacional de clanes familiares focalizando esencialmente en la clase terrateniente y encomendil, con un fuerte desinterés por una población flotante de comerciantes itinerantes que operaban principalmente a través de transacciones crediticias. Por el contrario, Johnson (1974), Socolow (1978) y Moutoukias (1988) se basaron en una población exógena o portuaria donde el movimiento migratorio jugó un rol crucial. Pese a sus inobjetables méritos las tesis de Johnson y Socolow adolecen de serias carencias metodológicas. Al exagerar el valor de los autos sucesorios, las cartas dotalas y los testamentos, Socolow indebidamente ponderó unos pocos momentos únicos en el ciclo de vida mercantil de los comerciantes porteños (aquellos del matrimonio, viudez y deceso), dejando a un lado el largo período de acumulación y desacumulación entre esos críticos eventos demográficos. De igual manera, acentuando el rol de las manumisiones, Johnson (1979) ha dado implícitamente implicaciones estratégicas a sólo dos momentos en el ciclo de vida de los esclavos porteños, aquellos de la libertad y el aprendizaje, con lo que si bien ha contribuido al conocimiento de la gestación de la clase asalariada, ignora un ciclo de vida completo de cambios domésticos ocurridos antes de la manumisión, así como de la historia de la segregación racial que le siguió cuando liberto.

A diferencia del mundo andino donde como hemos visto persistía el modo de producción comunal o de subsistencia, en el Río de la Plata, Johnson (1974) probó que el fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las castas, especialmente para

los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para la seguridad económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa tradicional. En forma similar, Rosal (1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la propiedad inmueble urbana, permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social que les hubiera sido negada dentro de la estructura estamental tradicional. Sin embargo, ¿ese potencial para la movilidad social se consolidó? ¿las compraventas de chacras, tiendas y casas eran seguidas por las compraventas de los esclavos que las poblaban?,<sup>52</sup> ¿transitarían los miembros de las castas cerradas de la esclavitud urbana colonial un proceso hacia un sistema abierto de clases con la sola presencia del mercado y el capital comercial? Contestar afirmativamente conduciría también, a resultados erróneos, pues la formación, amplitud y dinamismo de los mercados de mano de obra esclava urbana se hallaba frenada por la persistencia de un modo de producción comunal o de subsistencia representado por las llamadas fraternidades o naciones africanas.<sup>53</sup>

No obstante estas evidencias, McCaa, Schwartz y Grubessich (1979), y McCaa (1984) concluyen que la expansión y colonización capitalistas en América Latina en lugar de acelerar el mestizaje o crisol de razas reforzó la estratificación racial. En efecto, en la América Latina colonial al no haber el mismo espacio socio-político para todos, es la línea del color o de castas la que se convierte, según Halperín Donghi (1969), en un doloroso instrumento de control y de exclusión social, envenenando de sentimiento anti-peninsular a todos sus inculpatos, por lo general miembros de la elite, que procuraban un lugar en ese margen tan estrecho.<sup>54</sup> Más aún, sostener que las castas aisladas de la sociedad campesina andina transitarían a un sistema abierto de clases con la sola presencia del mercado y el capital comercial conduce, según Golte y la Cadena (1983), a resultados erróneos, pues la formación de los mercados de mano de obra rural se hallaba frenada no solo por la persistencia del modo de producción campesino o parcelario sino también por la persistencia del modo de producción comunal o de subsistencia.<sup>55</sup>

En tanto que para Roig (1982), la lucha de castas fue el particular modo en que se dio la lucha de clases y la lucha entre las fracciones de clase en el mundo colonial.<sup>56</sup> Esta es también la posición sustentada por Stoler (1992) para explicar el rol del mestizaje o mestización en el Sudeste Asiático; por Klein (1992) para explicar el mismo fenómeno en el Sudoeste Norteamericano; por Lombardi (1975) para el caso del Brasil; y por muy diversos y numerosos autores para demostrar dicha situación en el Cono Sur de América Latina.<sup>57</sup> Stoler se funda para ello en la noción de frontera interior, acuñada por Fichte en su famoso *Discurso a la nación Alemana*.<sup>58</sup> La pretensión de probar "Limpieza de sangre" no era, según Roig (1982) y Robinson (1979), un ardid ni un mecanismo legal mal visto en ese entonces, sino una vía legítima "...para asegurar una determinada posición social".<sup>59</sup> Una vía legítima que fue inaugurada en la Europa mediterránea para combatir la asimilación de los hebreos. En efecto, por el proceso de "limpieza de sangre" cualquier individuo podía --entre los momentos del bautismo, el matrimonio y el fallecimiento-- 'aclarar' legalmente, es decir cambiar un status racial por otro. Mientras hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se habría atrevido a desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.<sup>60</sup> Finalmente, para Andrews (1980) y Brown (1986), ni siquiera el fenómeno de la Independencia, pese a sus "buenas intenciones", quebrantó la continuidad del tipo de segregación racial, heredado de la colonia.

Analizando la experiencia contemporánea del llamado Tercer Mundo, Lemarchand (1968), Kuper (1971) y Connor (1972), hallaron que la descomposición de los sistemas

jerárquico-étnicos condujo a menudo a una considerable transformación social que fue acompañada de una formidable cuota de fracturas violentas.<sup>61</sup> En ese sentido, en la América Hispana, para Endrek (1966), Mörner (1980), Góngora (1975) y Cotler (1978), el proceso de diferenciación interna de las clases sociales no habría podido desarrollarse debido principalmente a los obstáculos que le oponían elementos étnicos y estamentales. Sin embargo, en otras sociedades, donde dichos elementos existían y donde el proceso de mestizaje o mestización tampoco se materializó, la sociedad de clases pudo por el contrario prosperar. En efecto, mientras en los estados norteños de los Estados Unidos las burguesías locales se pensaban a sí mismas en términos económicos o de clase, el patriciado o burguesía criolla en América Latina tomaba conciencia de sí misma en términos raciales o de casta, entendiéndose por este último término la posición social ocupada en un amplio abanico de innumerables cruzamientos étnicos.

Últimamente, influido por ciertas corrientes de pensamiento post-modernas,<sup>62</sup> Smith (1992) ha concluido que al igual que la conciencia de clase no surge automáticamente del modo de producción, la conciencia étnica tampoco surge automáticamente de condiciones objetivas tales como la nacionalidad, la religión, el origen geográfico o los atributos raciales, sino que es socialmente producida a través de las continuas y repetidas interacciones de grupos.<sup>63</sup> En ese sentido, Pietschmann (1987) ha afirmado que el color de la piel no siempre operaba como un estigma excluyente, pues si al grupo dominante y clientelístico le convenía incorporar a sus propias filas elementos sociales de otro color no dudaba en hacerlo; y Flores y Yudice (1990) han explorado cómo la identidad étnica latina en los Estados Unidos ha sido construida a través de luchas alrededor del lenguaje.<sup>64</sup>

Y como reacción frente a las interpretaciones sociologistas, demografistas y culturalistas, otra escuela de historiadores ha alegado que las aproximaciones historiográficas que no toman en consideración las cuestiones políticas, como las crisis de estado, tampoco pueden explicar por qué las transiciones ocurrieron. Para este nivel de análisis la clave para caracterizar una etapa histórica debe buscarse o bien en el grado de desarrollo y conformación de los órdenes políticos prehispánico, imperial-absolutista y nacional-republicano, o bien, en el grado de coexistencia entre dichos órdenes.

Mientras Beezley, Fals Borda y Wiarda hicieron eje en las crisis de estado; las aproximaciones etnológicas (Foucault) o antropológicas (Descola) lo hicieron en las matrices políticas, sociales y cosmológicas; Skocpol, Trimberger y Andrien lo hicieron en las crisis fiscales; y Pietschmann y Moutoukias en la corrupción de las elites.<sup>65</sup> Para las corrientes y autores citados, los moldes cosmológicos y comunitarios del orden prehispánico, las reglas, dispositivos o esquemas de relación que hacen posible todas las formas de intercambio, producción, consumo, predación, protección y transmisión; los patrones jerárquicos y nepóticos de estamentos y corporaciones; el sistema de fueros y privilegios corporativos; y el poder de las estructuras político-patrimoniales propias del orden colonial-absolutista habsburgo o de los Austrias persistieron aún después de haberse producido las Reformas Borbónicas y la denominada Revolución de Independencia.<sup>66</sup> Por ejemplo, el hecho de que en tiempos de Rosas (1836-52), e incluso en tiempos de la presidencia de Roca (1880-86), el gobierno siguiera reclamando el pago de personeros,<sup>67</sup> como requisito para que alguien “de posibles” lograra ser exceptuado del servicio de Milicia, reflejaría la permanencia del patrimonialismo militar.<sup>68</sup> Y pese a que los mayorazgos y las vinculaciones fueron prohibidos por la Asamblea del Año XIII (1813)--dichas instituciones lograron perpetuarse maquillados en la sucesión de los patronatos y los

beneficios capellánicos, hasta sancionarse en la segunda mitad del siglo XIX el Código Civil.<sup>69</sup> ¿Qué era lo que definía la constitución de una burocracia patrimonialista y corporativa? ¿fueron el patrimonialismo y el corporativismo, prevalecientes en el orden colonial-absolutista, semejantes a los vigentes durante el orden nacional-republicano? ¿fueron las limitaciones etno-céntricas (la *alternativa* y la legislación persecutoria del nepotismo), vigentes durante el orden colonial-absolutista, semejantes a las existentes durante el orden nacional-republicano?. No contestar estos interrogantes correría el riesgo de no poder explicar porqué las revoluciones acontecieron, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.

Finalmente, Hastings (2000) ha alegado que las aproximaciones historiográficas que no toman en consideración las cuestiones morales y espirituales, como las religiosas, tampoco pueden explicar por qué las transiciones ocurrieron.<sup>70</sup> Hidalgo (1982), Abercrombie (1986), Platt (1987), Szeminski (1990), Spier (1994), Canessa (2000) y Hall (2004) han sugerido que en momentos de extrema radicalización política, ésta se volvía una guerra de religión pues los originarios negaban su identidad cristiana, y resucitaban con más fuerza las ideas precolombinas de legitimación ritual. Más aún, Abercrombie (1990, 1992) y su discípula Pitzer (1992) han ensayado la tesis de que el rol y la participación de los originarios en los cabildos y las cofradías, que tenían la responsabilidad de montar el sistema de festividades religiosas, podía ser interpretado como en medio de una tensión entre los poderes secular y eclesiástico y simultáneamente como sucumbiendo y como resistiendo al poder colonial.

## Plan del Tomo-I

El tomo está dividido en ocho (8) secciones, y cada una de éstas en capítulos, totalizando treinta (30) capítulos, y más de un centenar de apartados y acápites, donde cada capítulo está identificado con su respectiva notación diferenciada. El tomo comienza con una breve introducción, seguida por la metodología y las fuentes documentales analizadas.

En la primera sección tratamos el trasiego cultural y las guerras en el contexto de un orden inquisitorial; en la segunda la configuración de un orden multicultural jerarquizado, estamental y esclavista; en la tercera la articulación de un *entrepôt* mercantilista con un *hinterland* minero-rural; en la cuarta el mercadeo y valorización de tierras, casas y mano de obra; en la quinta la explotación mercantil de un enclave minero; en la sexta la patrimonialización de una administración venal; en la séptima la corporativización de la burocracia colonial; y en la octava la aristocratización y nepotización del orden colonial-absolutista.

La sección primera está compuesta por tres capítulos, consistentes en la crisis orgánica en el estado colonial americano, la naturaleza contradictoria del estado colonial hispano-americano y el origen del auto-gobierno, y el reformismo erasmiano y las luchas intra-coloniales. La segunda sección la comprenden cuatro capítulos, consistentes en la intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada., la gestación de un patriciado rural, la retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial y la subalternización de los originarios como fuerza de trabajo colonial. La tercera sección está compuesta por siete

capítulos, consistentes en la guerra y la paz y las fases del comercio, las presiones mercantiles y el reparto forzoso en el siglo XVIII, y los ciclos del mercado de mercancías y el rol del crédito mercantil (siglo XVIII). La cuarta sección la comprenden cuatro capítulos: el mercado inmobiliario urbano y la movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII); el mercado inmobiliario rural y su incidencia en la estructura social Rioplatense; y el mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo). La quinta sección la comprenden cuatro capítulos consistentes en: la penuria de agua, azogue, y mano de obra en el Potosí de fines del siglo XVIII, la escasez de medios de vida en la industria minera, la fase extractiva de la minería colonial y la fase del refinado y cálculos de rentabilidad de la azoquería potosina.

La sexta sección la comprenden cinco capítulos: la venalidad de los oficios capitulares, el poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes, el patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la milicia, el reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica, y las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social. La séptima sección está compuesta de tres capítulos, la naturaleza de la burocracia colonial, la lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia, y las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia subordinada (Gobernadores, Virreyes y Oidores).

Y la octava sección está compuesta por seis capítulos, consistentes en el cortesanismo y endogamia en los Cabildos del interior del Río de la Plata (1760-1790), el etnocentrismo capitular en las ciudades carentes de inmigración del Río de la Plata (1700-1776), la exogamia en los cabildos y la inmigración de comerciantes peninsulares (1760-1810), las cuotas exógenas o endógenas en las recusaciones capitulares, y las nepotizaciones clerical y militar.

## **Sección I-A    Trasiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial**

En la historiografía del colapso imperial español, la de la crisis política propiamente dicha giró tradicionalmente alrededor de las repercusiones que las guerras de religión (1618-1648), y de sucesión (1700-13), así como las derivadas del Pacto de Familia (1754-56) tuvieron en sus colonias, y en especial alrededor de los episodios desencadenados por los expansionismos holandés y británico. Sin embargo, las repercusiones culturales y socio-religiosas que tuvieron en los siglos XVI y XVII el trasvasamiento cultural hispano y las proposiciones erasmianas, relativas a los rituales, las ceremonias y los sacramentos, rescatadas muchas de ellas de antiguos textos latinos, fueron por lo general ignoradas o dejadas de lado.

En esta primera sección, dedicada a investigar el contagio de la crisis colonial en el contexto de un orden inquisitorial, trato en tres capítulos consecutivos el trasiego o trasvasamiento cultural y las luchas intra-coloniales, la crisis orgánica en el estado colonial americano, y el análisis del origen del auto-gobierno, y de la naturaleza contradictoria del estado colonial hispano-americano

### **Capítulo I-A-1:      Trasiego cultural y luchas intra-coloniales.**

Índice

A-I. El desplazamiento violento del orden y la cosmología prehispánica.

A-II. Imposición de la cultura hispana y gestación de la cultura hispano-criolla

A-III. Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento Europeo.

A-IV. Luchas de facciones en la elite dominante

A-V. Facción Confederada e influjo erasmiano.

A-VI. Derecho al voto pasivo.

A-VII. Venta de cargos.

A-VIII. Nuevo bloque histórico.

A-IX. Requisitos de elección capitular.

### **A-I. El desplazamiento violento del orden y la cosmología prehispánica.**

El orden prehispánico y su cultura, que estaba fundado en un orden cosmológico pre-moderno, fue violentamente desplazado por el orden hispánico, su dominación monárquico-absolutista y su cultura del siglo de oro de los siglos XVI y XVII. Este nuevo orden de legitimación monárquica, se lo justificaba con el argumento que la corona castellana era heredera de las legitimidades azteca e incásica. Para la ideología del pactismo de la Escuela de Salamanca (Suárez, Mariana, Vitoria), la conquista de América era un pacto fundador por el cual los reinos indígenas, a semejanza de los reinos musulmanes, se incorporaron a la corona de Castilla.<sup>71</sup>

Este nuevo orden estaba a su vez cimentado en el dualismo entre cultura y naturaleza, que fue quizá el verdadero secreto del éxito del absolutismo colonial.<sup>72</sup> Pero este desplazamiento no fue homogéneo, pues contaba con profundas diferencias determinadas por las cualidades históricas, geográficas y etnológicas de las poblaciones prehispánicas.<sup>73</sup> Tal como lo anunciamos en la Introducción general, para poder evaluar y comparar estas diferencias el antropólogo francés Descola (2005) nos provee de un esquema cuatripartito de cuatro ontologías o distribución de propiedades: la animista, la totémica, la analógica y la naturalista, según como se articulaba entre humanos y no-humanos (plantas y animales) la sociedad y la naturaleza.<sup>74</sup>

A semejanza de las Guayanas y de la Nueva Guinea, en donde la construcción ontológica contaba con un comportamiento y unas formas exteriores diferentes o discontinuas y una interioridad (alma, espíritu) parecida o continua, las civilizaciones guaraníicas que poblaban el litoral paraguayo y rioplatense estarían fundadas en una construcción ontológica animista, conocida como “la tierra sin mal”.<sup>75</sup> Y parangonando con las civilizaciones maya y azteca, que fraccionaban el conjunto de interioridades y fisicalidades en una “multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas”, las culturas altiplánicas de América del Sud (quechuas, aymaras, diaguitas) estarían cimentadas en una construcción ontológica analógica.<sup>76</sup> Finalmente, los contingentes hispánicos de la conquista y la colonización al estar preñados de una discontinuidad en las interioridades y una continuidad en las fisicalidades (donde regían unas mismas leyes de la materia y la vida) estarían basados en una construcción ontológica naturalista.<sup>77</sup> Esta última y sólo ella autoriza --de acuerdo con Descola-- la coexistencia de diferentes

esquemas de relación (intercambio, predación, don, producción, protección, transmisión) donde ninguno alcanza a dominar a los otros.

## A-II. Imposición de la cultura hispana y gestación de la cultura hispano-criolla

El esquema ontológico naturalista habría emergido durante el renacimiento del seno del mundo analógico de la edad media.<sup>78</sup> Los colegios eclesiásticos y las universidades cuyas aulas integraron los maestros llegados de la península, son los que abrieron los cauces propicios a la corriente espiritual, intelectual y científica de dicho orden dualista. La distinción entre naturaleza y cultura tuvo una propagación creciente y diversa, cuyos resultados se palparon prontamente en el sentido de un peculiar sincretismo o adopción definitiva de los bienes del trasplante o trasiego; o como sostiene Grosso Lorenzo (2004) de una hibridación ascendente; o al decir de McClary (1997), de una “subrepticia difusión de trazos y tropos de otras procedencias étnicas y geográficas”.<sup>79</sup> No obstante la relevancia del largo y contradictorio proceso de búsqueda de un discurso cultural, literario y jurídico propio --donde la expresión de los agravios sufridos con la colonización abonara en la conciencia de las elites criollas la concepción de la independencia—este no mereció hasta el presente un tratamiento equivalente.<sup>80</sup>

En lo que respecta a la imposición de la cultura hispana, la presencia de escritores, poetas y juristas, algunos de los cuales decidieron permanecer en las distintas colonias americanas, contribuyó a complementar y fundir las experiencias con los conocimientos prodigados desde la cátedra. A Nueva España acudieron Mateo Alemán,<sup>81</sup> sevillano, autor de *Aventuras y Vida de Guzmán de Alfarache*, *Atalaya de la Vida*, novela cuya primera parte se publicó en Madrid en 1599, y de *Vida de San Antonio de Padua*, precedida de composiciones en versos latinos; el neoescolástico renacentista Alonso Gutiérrez,<sup>82</sup> discípulo de Fray Luis de León, con quien tuvo el privilegio de la amistad, y que al tomar el hábito religioso de San Agustín, se llamó Alonso de la Veracruz,<sup>83</sup> el bastardo Bernardo de Balbuena, autor de *Grandeza Mexicana*;<sup>84</sup> y Gutierre de Cetina, el italianizante y petrarquista poeta de los madrigales, así como eximio sonetista, quien a instancia de uno de sus hermanos, compañero dilecto de Hernán Cortés, arribó a México en el año de 1547.<sup>85</sup>

Asimismo, a tierras del Perú viajaron numerosos poetas y escritores que dejaron hondos testimonios de su estadía.<sup>86</sup> Entre ellos, ingenios como el lusitano Enrique Garcés,<sup>87</sup> traductor de *Los Lusíadas* de Camoens; y el poeta Montedoca, apodado “el Indiano”, ambos amigos de Cervantes;<sup>88</sup> el andaluz Luis de Belmonte Bermúdez;<sup>89</sup> el renacentista Diego Dávalos y Figueroa, fundador de la Academia Antártica;<sup>90</sup> los sevillanos Diego Mexía de Fernangil,<sup>91</sup> y Mateo Rosas de Oquendo,<sup>92</sup> fray Diego de Hojeda, dominico y regente de su orden, autor de *La Cristiada*, poema barroco en octavas reales, considerado el primero de los épicos sagrados españoles,<sup>93</sup> y muchos poetas y dramaturgos, algunos que escribían en lenguas originarias (quechua, aymara y nahuatl) como Juan de Espinosa Medrano, apodado “El Lunarejo”,<sup>94</sup> y Fray Luis Jerónimo de Oré, mencionado este último en ese entonces por una poetisa anónima.<sup>95</sup>

La imprenta llevada a Nueva España por el Virrey Antonio de Mendoza en los primeros años de la colonización,<sup>96</sup> y al Perú por los Jesuitas en 1567,<sup>97</sup> significó un apoyo categórico a la acción de los colegios y universidades en el desarrollo de las letras y el género poético. La aparición de libros impresos en ambos territorios, los de mayor importancia en América para el orden imperial-absolutista, tanto desde el punto de vista de

los intereses materiales como religiosos, profundizó el afán por el estudio y la creación artística. Del Inca Garcilaso se editaron los *Comentarios Reales* y fue el primer americano en escribir en lengua de castilla;<sup>98</sup> de Sánchez Viana, se publicó *Arte Poético en España*;<sup>99</sup> de Diego Aguilar y Córdoba,<sup>100</sup> se editó *El Marañón*, crónica en verso, entre otras obras literarias y religiosas que fueron apareciendo hasta fines del siglo XVII. El rol de las bibliotecas públicas y privadas, así como la de los bibliófilos, también significó un bastión decisivo en el cultivo de la prosa y el verso.<sup>101</sup> Las Academias Literarias y los certámenes poéticos constituyeron a su vez un centro de difusión e inspiración de la vena poética.<sup>102</sup>

En estos testimonios ex-profeso compendiados, puede apreciarse el florecimiento en Hispano-América, de un discurso al estilo de la metrópoli y la recepción estética de los géneros, las métricas y los tropos literarios (virgilianismos, pindarismos, petrarquismos, garcilacismos, gongorismos) vinculados al renacimiento y a los barrocos español e italiano, así como la presencia de profusos tratados de cortesía y buenas costumbres, los cuales constituyen hitos para profundizar el desarrollo intelectual que se dio en los distintos virreinos.<sup>103</sup> Al respecto, señalemos que en 1540, apenas unos veinte años después del sitio de México, algunos indígenas de la nobleza Mexicana vencen la angustia de la influencia y escriben, según Bernardino de Sahagún, versos heroicos en latín,<sup>104</sup> y en 1586, apenas transcurrido medio siglo de la iniciación de la conquista y del trasiego y trasplante cultural, más de dos centenares de poetas acudieron a un certamen convocado por obispos regionales.<sup>105</sup> Esta última circunstancia es otro signo de la recepción alcanzada en América por diversos géneros literarios.<sup>106</sup>

### **A-III Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento Europeo**

Pese a la aparente homogeneidad ideológica, las cosmovisiones y pensamientos de las facciones capitulares en pugna no eran tan semejantes. Mientras la elite colonizadora continuaba cultivando los textos clásicos griegos y latinos y en ella predominaban los disciplinamientos ético-religiosos de la guerra contra el Islam y la conducta inquisitorial que instrumentó la expulsión de los judíos —en las cuales por regir una suerte de responsabilidad colectiva o “culpa de la inocencia” los crímenes de los individuos “trascendían a los parientes”—en la época que siguió el ideario y los procedimientos extirpatorios y persecutorios de la Inquisición se fueron paulatinamente amortiguando.<sup>107</sup>

No es extraño entonces que el famoso debate acerca de las nociones de virtud y nobleza, que fueron lugar común entre los humanistas del Renacimiento Europeo,<sup>108</sup> haya llegado con tardanza a través de clásicos latinos como Salustio,<sup>109</sup> o a través de *El Príncipe Cristiano* de Erasmo, de “*El Banquete*” de la Divina Comedia, o de las obras de Buonaccorso da Montemagna, Giovanni Francesco Poggio Bracciolini y Giovanni Nenna,<sup>110</sup> existentes para entonces sólo en las bibliotecas de algunos clérigos.<sup>111</sup> Ya en el siglo XVII, las citas de autoridad de autores clásicos greco-latinos se difunden cada vez mas en los foros, donde se citan textos de Anicio Boecio, Salustio, Virgilio, Ovidio, Cicerón y Tácito.<sup>112</sup> Las proposiciones erasmianas, relativas a los rituales, las ceremonias y los sacramentos, en especial del matrimonio, entresacadas de textos latinos, fueron identificadas en un principio como un desafío ideológico, luego fueron

condenadas como herejía, y acabaron, en 1559, siendo prohibidas por el Papa Pablo IV y, en 1612, por el Index o *Índice español*.<sup>113</sup>

A pesar de esta prohibición, algunos eruditos españoles, como Luis de Granada y Venegas del Busto, tuvieron éxito en difundir las ideas erasmianas. En Buenos Aires, el Obispo Pedro de Carranza, un fraile Carmelita influido por la Reforma Teresiana (un movimiento religioso liderado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz), y el cabildante Juan de Vergara, dos de los mas influyentes individuos en el círculo político dominante del Río de la Plata (que a propósito eran primos), tenían entre sus libros las obras completas de Fray Luis de Granada, incluida su famosa *Guía de Pecadores* (que de acuerdo con Marcel Bataillon tenía una clara semejanza con el *Enchiridion* de Erasmo), y que antes de ser expurgada en 1561 había sido incluida en el *Index*.<sup>114</sup> Además, Juan de Tapia de Vargas, un comerciante, terrateniente y político, era uno de los pocos que tomó partido a favor del Gobernador Céspedes en 1629, así como el único que trató en el siglo XVII de fomentar la manufactura local. También tenía en su biblioteca privada la "*Agonía del Tránsito a la Muerte*", de Venegas del Busto, que siguiendo a Bataillon, tomaba prestado capítulos enteros de la "*Preparación para la Muerte*" de Erasmo.<sup>115</sup> Por un lado, el Obispo Carranza estaba enteramente comprometido durante la década de 1620 con los intereses de la facción Confederada, orientada hacia el mercado externo, con la cual sus intereses burocráticos y personales se hallaban estrechamente ligados. Por el contrario, el Cabildo Eclesiástico, que gobernaba la principal iglesia de la nueva diócesis de Buenos Aires, y muy específicamente su diácono Paraguayo Francisco de Zaldívar, estaba totalmente imbuido del ideario inquisitorial y de los intereses de la facción Benemérita, orientada hacia el mercado interno.<sup>116</sup>

#### A-IV Luchas de facciones en la elite dominante

A través de la larga cadena de intereses económicos orquestados por las burguesías comerciales y mineras, los conflictos ocurridos en el cono sur de Hispano-América fueron en parte herederos de los provocados por la conquista y la colonización en el siglo XVI. En la primera mitad del siglo siguiente dichos legados se convirtieron en causales de nuevas luchas intra-coloniales. El conflicto se dio primero en el principal enclave minero, Potosí, y en segundo lugar, en uno de sus *entrepôt* o puertos de salida, Buenos Aires. Ambas luchas fueron manifestaciones de un fenómeno similar principalmente el rol revolucionario jugado por el capital comercial expresado en el mismo nivel institucional, el Cabildo.<sup>117</sup> En Potosí la lucha alcanzó niveles de una violencia inusitada entre los *vascongados*, la mayoría dueños de minas e ingenios, y los *vicuñas*, la mayoría terratenientes (de origen criollo o español no vasco), y comerciantes Portugueses. En Buenos Aires, sin embargo, el conflicto ocurrió entre los *Beneméritos*, que representaban los intereses económicos de los productores orientados hacia el mercado interno, y los *Confederados*, representantes de los intereses de contrabandistas, traficantes de esclavos, y nuevos pobladores Portugueses. En esos casos, una victoria se alcanzó en ambos lugares, los vascongados y los confederados pudieron preservar su hegemonía política.

Ambos, los *Beneméritos* y los *Confederados* eran facciones políticas dentro de diferentes corporaciones y estamentos. De aquí que, las luchas intra-coloniales en el Buenos Aires del siglo XVII consistían no solo en conflictos inter-estamentales pero también en oposiciones inter-corporativas. A fines del siglo XVI, el Cabildo de Buenos Aires estaba fuertemente representado por los *Beneméritos*, que representaban los intereses orientados hacia el mercado interno. Los *Beneméritos* ganaron hegemonía y

legitimidad en materia política esencialmente a través del Cabildo. Temprano en el siglo XVII las luchas que asomaron por el control del Cabildo aparentaban ser luchas entre diferentes estamentos y facciones políticas (*Beneméritos* versus *Confederados*). En realidad, fueron luchas entre facciones de la elite dominante: los *Beneméritos*, que eran principalmente productores orientados hacia el mercado interno, versus los *Confederados*, que eran comerciantes orientados hacia el mercado externo. Esta lucha a largo plazo estimuló la formación de un nuevo bloque histórico.

#### A-V Facción Confederada e influjo erasmiano.

La principal característica de la facción *Confederada* era su ofensiva ideológica expresada en una suerte de reformismo erasmiano, nutrido por el procedimiento casi libre en que los libros ilegales estaban siendo introducidos por Buenos Aires durante la Tregua de los Doce Años (1609-1621). Una vez que Felipe III murió y la Guerra de los Treinta Años (1621-48) comenzó, las oportunidades para los conversos portugueses (cristianos nuevos) de introducir libros ilegales y participar en la vida hispanoamericana se incrementaron aún más.<sup>118</sup> La exuberancia del pensamiento neo-erasmiano o lascasiano (Robles, Vives, Valdés), se expresó en la forma en que los militantes confederados luchaban contra los patrones de comportamiento etnocentristas e inquisitoriales practicados por los Beneméritos.<sup>119</sup> Ya en la década del 1610 algunos comerciantes se quejaban del genocidio de originarios y de las prácticas chauvinistas. La embrionaria conciencia de clase de la burguesía mercantil estaba siendo desarrollada a través de una intensa crítica de la sociedad feudal. En 1614, Simón de Valdés y Mateo Leal de Ayala, ambos Confederados, procesaron a Francisco de Salas Videla, un líder Benemérito, por su participación en una masacre de indígenas que había ocurrido en 1609 en Córdoba.<sup>120</sup>

Con relación a la estrategia seguida por los Confederados para conquistar el poder, Juan de Vergara, su principal líder, rechazó la posibilidad de que los Confederados pudieran encontrar una herramienta auténticamente reformista exclusivamente a través de los mecanismos electorales de un parlamentarismo propio de un orden imperial-absolutista (cabildos). También insistió que la única manera de quebrar la hegemonía Benemérita era incorporando gradualmente los miembros de la "sociedad civil" bajo la hegemonía Confederada y combinando un par de mecanismos para reclutar la elite política: las elecciones capitulares y la adquisición venal en subasta de los oficios públicos.

Más aún, a diferencia de la actitud seguida respecto al genocidio y al chauvinismo, la conducta hacia el nepotismo observó un doble criterio dependiendo de quien lo practicaba. Mientras ya en 1589 y 1627 el Cabildo de Buenos Aires confrontó a los Gobernadores españoles sobre su intento de designar varios de sus parientes en puestos públicos, los cabildantes propietarios se comportaron como si esta regla ética no les concerniera en absoluto.<sup>121</sup> A propósito, cuando Juan de Vergara, el líder de la facción Confederada, adquirió cinco regidurías o regimientos, de Buenos Aires, en el mercado de Charcas, los colacionó en su suegro Diego de Trigueros, en su cuñado Juan Barragán, y en su ahijado Juan Bautista Ángel.<sup>122</sup> Aunque las Leyes de Indias formalmente prohibían el nepotismo ya fuere en designaciones a puestos públicos o en la elección de candidatos a los cargos municipales, la implementación práctica de estas leyes experimentó profundas alzas y bajas. Con relación a ello, el objetivo intentado de desalentar el nepotismo fue traicionado desde el mismo comienzo del proceso colonizador de Buenos Aires por aquellos que se suponía venían a quebrar el bloque político-ideológico tradicional.

Subordinando los funcionarios tradicionales a la hegemonía de funcionarios "reformistas", la facción Confederada fue capaz de quebrar la unidad política de la facción Benemérita. Mientras los funcionarios Confederados gradualmente ganaban en unidad política, los funcionarios Beneméritos perdieron mucha de su antigua cohesión y solidaridad. La elite Benemérita fracasó en mantener un frente unido incluso en oportunidad de agresiones. Presionados entre voluntades antagónicas, sus integrantes tuvieron que practicar dolorosas opciones personales y políticas.

Ya en 1608, habiendo logrado convencer al Rey y al Virrey en subordinar la gobernación del Río de la Plata al control judicial de la Real Audiencia de Charcas, los pobladores Confederados pioneros fueron capaces de equilibrar el poder local de la elite Benemérita, tradicionalmente bajo la hegemonía Paraguaya.<sup>123</sup> Más luego, en 1608, Diego de Vega, un pionero de la facción Confederada, logró convencer a la Audiencia de Charcas en revocar la sentencia de Hernandarias contra Gaspar de Acevedo, el Escribano de Registro y Real Hacienda, un funcionario público que había sido acusado de introducir 198 esclavos.<sup>124</sup> Cuatro años más tarde, en 1612, Diego de Vega y Juan de Vergara, precursores de la facción Confederada, ganaron para su lado al Tesorero Real Simón de Valdéz, el ex Teniente del Gobernador Hernandarias.<sup>125</sup> Dos años mas tarde, en 1614, Simón de Valdés y Tomás Ferrufino, como miembros del Cabildo y líderes de la facción Confederada, ganaron para su lado a Francisco de Manzanares, un encomendero y terrateniente, prometiéndole que sería designado Procurador General y Mayordomo de la Ciudad; y al cabildante Felipe Navarro, en retribución por la promesa de que sería designado Alcalde de la Santa Hermandad.<sup>126</sup> De la misma manera, el Gobernador Góngora ganó para el lado Confederado a Gabriel Sánchez de Ojeda, un abogado, que una vez en el pasado reciente fue expulsado de la ciudad de Buenos Aires por tratar de defender los intereses de la facción Benemérita.<sup>127</sup> Quebrando el bloque burocrático Benemérito, el liderazgo Confederado fue capaz de subordinar gradualmente bajo su hegemonía los intereses de alcaldes, notarios, Oficiales Reales, y procuradores tradicionales.

Además, desbaratando el bloque político-ideológico benemérito, los mercaderes confederados orientados hacia el mercado externo estaban capacitados para incorporar gradualmente bajo su hegemonía a los miembros de la sociedad civil de Buenos Aires, compuesta por comerciantes minoristas, médicos, maestros, artesanos, pulperos, mayordomos de capellanías y cofradías, propietarios de tierras no encomenderos, extranjeros, abogados, y miembros libres de las castas, y crearon consecuentemente un bloque históricamente nuevo. Los médicos sin licencia (curanderos y barberos) y los maestros, considerados una suerte de "intelectuales tradicionales", contemplaban al Cabildo, único órgano que otorgaba dichas licencias, con hostilidad por cuanto tenía la facultad de excluirlos de la sociedad civil. Consecuentemente, en torno de esta cuestión resultaron severas contiendas.<sup>128</sup>

#### **A-VI Derecho al voto pasivo.**

En su lucha intra-colonial contra los Beneméritos, los Confederados no pudieron alegar una prosapia distinguida, procedente de los primeros pobladores y conquistadores, ni la virtud de sus ancestros, como lo hicieron los Beneméritos. A partir de la defensa del derecho a ser elegidos como alcaldes o funcionarios públicos de aquellos que eran de origen extranjero o habían sido artesanos y pulperos en el pasado, los Confederados estaban capacitados tanto para burlar la idea feudal de que el linaje contaba con sus propios

derechos, como para incorporar a nuevos sectores sociales en su programa político y económico. En marzo de 1619, por ejemplo, Juan de Vergara, el intelectual orgánico de la facción Confederada, fue capaz de ganar el apoyo para Juan Cardoso Pardo, un candidato para un cargo capitular, contra objeciones fundadas en el hecho de que Torres había sido un zapatero y un pulpero.<sup>129</sup>

El proceso de desbaratar el bloque ideológico de la hegemonía benemérita no consistía sólo en frustrar o disminuir las prácticas genocidas y chauvinistas, sino también en intentar imponer una reforma moral, intelectual, económica y política. Una reforma moral implicaba de parte de los funcionarios eclesiásticos progresistas un interés creciente por una justicia que sería idéntica para todos. Esto fue realizado a través de las restituciones y donaciones impuestas como penitencias en testamentos. Fue realizado también a través de la "libre voluntad" en la selección de consortes en las decisiones judiciales en las cortes eclesiásticas.

Además, una reforma económica tuvo lugar, con nuevos contratos societarios y un agudo incremento en las transacciones crediticias. Una vez que el bloque ideológico y político de la facción Benemérita fue demolido, Diego de Vega, la cabeza de la red o conexión contrabandista, alcanzó un acuerdo societario con Manuel Rodríguez de Acevedo para introducir una enorme cantidad de esclavos en Potosí y Chile.<sup>130</sup> Un día más tarde, Manuel Rodríguez de Acevedo cedió sus derechos a favor de Juan de Vergara.<sup>131</sup> Vega y Vergara entonces vendieron cientos de esclavos a crédito desde Buenos Aires hacia el interior. Adelantando esclavos a crédito Vega y Vergara ensancharon su influencia política y obtuvieron una larga lista de seguidores. Muchos de aquellos que se endeudaron con Vega y Vergara tornaron en ser los miembros más leales de la facción Confederada.<sup>132</sup> Debido a esta polarización la membrecía del Cabildo se dividió profundamente, marcando un punto de inflexión en la historia de la política colonial de Buenos Aires.

Finalmente, comenzando en 1608, mucho antes de que ocurriera la principal crisis de hegemonía, en 1614, cuando la mayoría de los viejos encomenderos y cabezas fundadoras de las familias porteñas comenzaron a perder su liderazgo económico y social, la nueva burguesía mercantil centrada en el tráfico esclavo, comenzó una reforma política.

El Cabildo de Buenos Aires pasó de ser casi una Junta de Encomenderos a ser casi un Consulado de Comercio. Cada vez que los intereses orientados hacia el mercado externo controlaban el estado colonial de Buenos Aires, el Cabildo se asemejaba más fuertemente a un Consulado de Comercio, y la composición de la junta del Cabildo experimentaba una expansión súbita. La posición de Buenos Aires como el asiento informal del gobierno del Río de la Plata (así como la residencia de una burguesía mercantil) tendía a conferir sobre el Cabildo de Buenos Aires una porción desproporcionadamente amplia de poder político para un cuerpo municipal, particularmente cuando se lo compara con aquellos Cabildos de las ciudades interiores. Pero este cambio en la naturaleza política del Cabildo no ocurrió sin contiendas intra-coloniales.

## **A-VII Venta de cargos.**

Los representantes del capital comercial, implicados en el contrabando intra-colonial a comienzos del siglo XVII, comenzaron a dominar el Cabildo comprando los cargos municipales de Buenos Aires en la Real Audiencia de Charcas. La venta de cargos

reales y municipales incrementaba los ingresos reales e impedía los conflictos relacionados con la confiscación y valuación de la mercadería contrabandeada. También se evitaban los conflictos relacionados con la concesión de certificados de impuestos aduaneros para introducir esclavos africanos, productos brasileiros, y mercadería europea. Esta venta de cargos públicos sólo afectaba a los regimientos o regidurías, a las depositarías, a las escribanías, a los alguacilazgos y a las oficialías reales. Tales ventas en ambos virreynatos de México y Perú se remontaban tan atrás como el año 1591, pero quince años más tarde, en 1606, la corona española cesó de otorgar regimientos, que se volvieron disponibles solo por renunciación.<sup>133</sup> El efecto de la Cédula de renunciaciones de 1606 sobre las dignidades municipales se evidenció también en Buenos Aires.<sup>134</sup>

El grado de independencia de los cargos públicos en Buenos Aires dependía ampliamente del tipo de política fiscal adoptada. Los intereses orientados hacia el mercado externo de Buenos Aires demandaban más autoridad política en secciones de la burocracia colonial, en las que percibían mayores oportunidades de negocios y menor competencia. Cuanto más poderoso era el cargo burocrático y cuanto menos sometido estaba al control externo, tanto mayor era su demanda y tanto más alto su valor monetario. Cuando los Oficiales Reales y los notarios comenzaron a ser autorizados a investigar (visitar) navíos entrantes, el precio de los oficios públicos alcanzaron un alto valor comercial en el mercado de Charcas. Este incentivado valor estuvo alimentado por el hecho de que en 1614 (y de nuevo entre 1619 y 1621) los Oficiales Reales y los notarios fueron capaces de participar en asambleas capitulares. Por lo tanto, cuando perdieron estos derechos, el valor de mercado de estos oficios se desplomó drásticamente. Cuando los oficios públicos fueron estrechamente monopolizados, especialmente los oficios notariales y los alguacilazgos, sus precios alcanzaron el valor más alto posible en el mercado de Charcas. La competición más intensa era posible que sucediera. La Escribanía Pública y de Cabildo, que devino vacante con la muerte de Juan Ramírez de Abreu, fue vendida en 1608 a Cristóbal Remón en subasta pública en \$2.900. Siete años más tarde, en otra subasta, el precio de este oficio en particular se dobló (\$7.500).<sup>135</sup> Más aún, la Escribanía de Minas, Registro y Hacienda Real de Buenos Aires, un oficio más que valioso por su responsabilidad para controlar el tráfico de esclavos, fue vendido en Charcas en 1608 en \$7.000 a Gaspar de Acevedo. Veinte años más tarde, el hijo de Acevedo, Domingo de Roxas y Acevedo, vendió este último oficio al doble de su precio original (\$12.000) a Juan Antonio Calvo de Arroyo.<sup>136</sup>

En el caso de las regidurías los precios respectivos permanecieron indistintamente bajos. Desde que sus tenedores no recibieron ni salarios ni aranceles, tales oficios, no fueron aparentemente rentables. Sin embargo, como es indicado por el valor comercial de estos oficios aparentemente de valor despreciable, estas posiciones proveyeron a su vez de entrada en otros oficios que serían, de hecho, generosamente rentables. Estos oficios eran de tres tipos distintos: oficios con ingresos arancelados (el Fiel Ejecutor), oficios asalariados (Procurador General, Defensor de Menores, Mayordomo de Propios, y Mayordomo de Hospital), y oficios de retribución simbólica (Alférez Real). En una Tabla se muestra una lista de cabildantes que compartieron durante sus vidas esos puestos públicos.<sup>137</sup> Por ejemplo, el regidor Sebastián de Orduña fue elegido como Alférez Real en 1611 y 1614, como Fiel Ejecutor en 1611 y 1616, como Procurador General en 1610, y como Mayordomo de Hospital en 1612. El Regidor Francisco de Manzanares fue elegido como Fiel Ejecutor en 1610 y 1619, como Procurador General en 1614 y 1615, y como Alguacil Mayor en 1615 y 1619. De igual forma, el regidor Diego de Trigueros fue elegido

como procurador general en 1608, como mayordomo de hospital en 1617 y 1618, y como fiel ejecutor entre 1619 y 1621.<sup>138</sup>

Sin embargo, el prestigio adquirido por Buenos Aires (debido al crecimiento comercial y demográfico) y los oficios con ingresos arancelados ofrecidos por el Cabildo figuraban como los principales factores en el valor relativo de las regidurías. En 1617 seis regidurías de Buenos Aires fueron vendidas en Charcas en \$700 cada una. No obstante, el comprador Juan de Vergara no pudo hacerlas efectivas hasta 1619.<sup>139</sup> Más luego, las regidurías fueron vendidas. En 1624 Vicente Bracamonte adquirió una regiduría en \$550. En 1626 el Cap. Domingo de Ibarra adquirió otra regiduría en \$730. Finalmente, en 1629, Don Diego de Roxas y Briones adquirió otro regimiento en \$600.<sup>140</sup>

Más aún, también particular y específicamente relacionado con la incorporación de Buenos Aires en el restringido comercio de las metrópolis mercantil-absolutistas de la época, los precios de los Oficios Reales de contador y tesorero se multiplicaron increíblemente. En 1615, Francisco García Romero, Felipe Navarro, y Francisco Bernardo Xijón depositaron en Buenos Aires una seña o pago adelantado de 1.000 ducados como fianza por la compra del oficio de contador ocupado por Luis de Salcedo.<sup>141</sup> De resultados de su creciente importancia, el valor de la contaduría se dobló en Buenos Aires en la década de 1620. Precisamente, en 1629, el mismo Luis de Salcedo obtuvo una fianza para el mismo propósito que en 1615, por 23.000 ducados (gracias a las firmas de Sebastián de Orduña y Juan Fernández Camacho).<sup>142</sup> La tesorería exhibía una importancia comparable. En 1622, Francisco de Manzanares y Hernán Suárez Maldonado depositaron un pago en efectivo de 2.000 ducados para la adquisición de la tesorería ocupada por Alonso Agreda de Vergara.<sup>143</sup> En forma similar, el precio del oficio del alguacil mayor trepó hasta las nubes. En 1623, cuando Martín Martínez de Eulate adquirió el oficio de Alguacil Mayor, tuvo que pagar una fianza de \$10.000. Este alto precio fue cubierto por siete diferentes fiadores que también supieron ser los principales contrabandistas de esclavos de su tiempo. Por ejemplo, Antonio de Govea hizo un pago en efectivo de \$2.000. Gaspar de Gaete depositó \$1.000. Alonso Guerrero de Ayala, Alonso Caravallo, Matías Machado, Diego López de Lisboa, y finalmente, Antonio Álvarez depositaron \$1.400 cada uno.<sup>144</sup>

Aquellos que adquirían oficios públicos garantizaban su perpetuidad en los puestos capitulares. Por ejemplo, los cuñados Juan de Vergara y Juan Barragán sirvieron como regidores perpetuos por casi treinta años. De hecho, votaron en cada asamblea anual desde 1619 hasta 1650. Se abstuvieron solo entre 1615 y 1618 y en 1628-1629 cuando fueron expulsados de la asamblea concejil por ser Confederados.<sup>145</sup> El hecho que ciertos vínculos económicos y financieros entre poderosos comerciantes y cabildantes propietarios fueron establecidos antes que las autoridades municipales ocuparan sus cargos consolidó aún más el bloque en el poder. En una Tabla se muestra una lista de cabildantes con las fechas cuando se incorporaron en el tráfico de esclavos así como los años cuando se convirtieron en cabildantes o adquirieron chacras o estancias.<sup>146</sup> En todos estos casos su ligazón con el tráfico de esclavos precedió sus cargos públicos así como sus adquisiciones inmobiliarias.

El estado colonial puede no haber sido capaz de impedir que los factores económicos y financieros individuales jugaran un muy importante rol en las políticas de Buenos Aires. Pareciera que los acreedores de eventuales alcaldes les sirvieran de promotores de sus candidaturas. En 1633, dos años antes de ser elegido alcalde ordinario, Marcos Sequera tomó prestado \$5.790 del Lic. Martín Martínez de Eulate, quien en ese tiempo era Alguacil Mayor, en dos transacciones.<sup>147</sup> En 1640, un año antes de ser elegido

alcalde de segundo voto, Pedro de Giles tomó prestado \$2.791 de manos del procurador general del Colegio Jesuita R.P. Tomás de Ureña, S.J.<sup>148</sup> En una forma similar, los deudores de los futuros alcaldes pueden haber jugado el rol de propagandistas en sus lobbies pre-electorales. Por ejemplo, Enrique Enríquez tomó prestado \$1.000 de Juan de Mena en 1637, un año antes este último fue elegido como alcalde de primer voto.<sup>149</sup>

Como era el deber del Cabildo reclutar funcionarios públicos para fijar vínculos, los cabildantes patrimonialistas (aquellos que habían comprado sus cargos) también instrumentaban estos vínculos para consolidar el bloque de poder. Cada autoridad que era sometida al juicio de residencia (el juicio luego de haber dejado un cargo público), como un gobernador, o quienquiera que hubiera tratado con fondos públicos, como un funcionario del tesoro, tenía por deber establecer vínculos antes de su recepción formal en el Cabildo. Desde que el monto para este vínculo era considerable, los gobernadores y los funcionarios reales encontraban imposible pagar éste con sus reservas personales. Kenneth Andrien reveló, en el caso del Perú, que aunque los pagos de una fianza no necesariamente comprometen a un Oficial Real con los intereses de su fiador, si provee un vínculo evidente entre los Oficiales Reales en la Tesorería y vecinos prominentes, por lo común miembros del Cabildo. En otra se ilustran estos vínculos incestuosos en Buenos Aires.<sup>150</sup> Dichas Tablas, publicadas en un trabajo anterior del autor, revelan como Enrique Enríquez, Juan de Mena y Marcos de Sequera, quienes comenzaron como traficantes de esclavos, terminaron un período más tarde apoyando a un Tesorero, a un alguacil mayor, y a un gobernador, respectivamente, en sus requisitos legales para depositar fianza. Más aún, porque los salarios de los funcionarios españoles eran generalmente bajos y muy demorados en su concreción, muchos Oficiales Reales recurrieron a los esclavistas para préstamos, créditos y subsidios. En reciprocidad, los Oficiales Reales a menudo vendían con una tasa de descuento el derecho a recaudar sus salarios.

Sin embargo, la perpetuidad de los oficios adquiridos no era siempre garantida. Durante la década de 1630 problemas sobre fianzas e instrumentos de deuda fueron elevados con el intento de socavar el poder sobre su oficio de los funcionarios propietarios. Cuando el fiador responsable fallecía o entraba en quiebra, los funcionarios públicos eran requeridos para que buscaran nuevos fiadores. Por ejemplo, cuando el Cap. Diego Páez Clavijo y el Cap. Nuño Fernández (ambos fiadores garantes del Tesorero Juan de Vallejo) fallecieron, los miembros del Cabildo, especialmente Juan de Vergara, urgió a Vallejo en 1637 para que antes que pudiera ser reinstalado obtuviera un nuevo fiador que respondiera por su fianza de 2.000 ducados.<sup>151</sup> De una forma semejante, cuando los funcionarios públicos debían a las Cajas Reales parte del precio de su propio oficio el Cabildo suspendía el uso del mismo. Luego que Juan Antonio Calvo de Arroyo adquiriera la escribanía a Domingo de Roxas y Acevedo en 1626, el Cabildo de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Juan de Vergara, impidió que Calvo de Arroyo utilizara su oficio, fundado en que aún debía parte del precio del mismo a la corona y al propio vendedor.<sup>152</sup>

#### **A-VIII Nuevo bloque histórico.**

Aparte de la alianza con algunos sectores sociales locales, el nuevo bloque histórico hegemonizado por los mercaderes orientados hacia el mercado externo fue ampliado mediante una contradictoria alianza con encomenderos norteños y dueños de ingenios y yacimientos mineros. Este nuevo bloque histórico era cimentado mediante una renta producida por las tierras del norte y los yacimientos de plata. Esta renta no era invertida ni gastada en las ciudades del interior. La renta vino a alimentar a los tratantes de

esclavos porteños, favoreciendo de este modo el despegue comercial de la región. No hay que sorprenderse entonces, que durante las décadas de 1630 y 1640, una extensa rebelión indígena estallara en la provincia de Tucumán (valle Calchaquí) y una rebelión de Comuneros en el Paraguay contra la Compañía de Jesús. Estas rebeliones probaron, a pesar de la buena voluntad que el liderazgo Confederado pudiera haber mostrado, la intensidad del descontento y oposición indígenas y criollos a la opresión colonial orquestada por la burguesía comercial de Buenos Aires, en alianza con la burguesía minera Altoperuana y los intereses jesuíticos.<sup>153</sup>

Por otra parte, la principal característica de la facción Benemérita era su negligencia ideológica, expresada en la pobreza de su pretendido liderazgo moral y cultural, la cual estaba fundada en prejuicios raciales, religiosos y sexuales, propios de un orden imperial-absolutista, que se acentuaron con las prácticas de la excomunión y la extirpación de idolatrías introducidas por la Inquisición de Lima.<sup>154</sup> Obviamente estos prejuicios no podían haber sido el discurso ideológico de una vanguardia social, capaz de aportar un liderazgo hegemónico, pero sí el de un mecanismo represivo. La indigencia de los prejuicios raciales y de género como programa político se alimentaba de una defensa negativa del status quo, sin establecer una alternativa teórica y, mucho menos, sin proponer una forma ideológica e intelectual de afirmación social. Ya en 1619, quince años antes de la *complicidad grande* descubierta en Lima, el Cap. Manuel de Frías, Apoderado General del Río de la Plata, un poderoso aliado de los Jesuitas y el representante de los productores orientados hacia el mercado interno, propuso a la corona española un extenso *memorandum* rogando por la inauguración de una oficina de la Inquisición en Buenos Aires., para poner un alto a los numerosos arribos de "cristianos nuevos Portugueses anteriormente judíos", que amenazaban la pureza de la religión y constituían un monopolio económico, por cuanto "...muchos de ellos eran ricos y poderosos y muy inteligentes en toda clase de mercancías y esclavos".<sup>155</sup> De un modo semejante, cuando esos intereses gobernaban Buenos Aires, la facción Benemérita trató consecuentemente de impedir que la Iglesia local fuera infiltrada con curas españoles, muchos de ellos influidos por el ideario Erasmista. El Gobernador Hernandarias escribió al Rey en 1617 pidiéndole que se ahorrara los gastos de enviar sacerdotes Europeos, en quienes no confiaban, y tratara por todos los medios de imponer a los curas criollos (la mayoría de ellos mestizos), una suerte de intelectuales tradicionales, que trajo de Asunción.<sup>156</sup> También, cuando en 1621 el Cabildo Eclesiástico eligió al Diácono Francisco de Zaldívar, un Paraguayo que representaba dentro de la iglesia a las fuerzas orientadas hacia el mercado interno, para reemplazar al Obispo Carranza, una suerte de intelectual orgánico de los intereses orientados hacia el mercado externo, que estaba fuera de la ciudad, el clero secular de Buenos Aires experimentó su primer serio conflicto interno. Eligiendo al Diácono, el Cabildo Eclesiástico antagonizó al poder del Obispo para designar prebendados.<sup>157</sup>

Finalmente, los representantes de los intereses orientados hacia el mercado interno intentaron impedir la interferencia del capital comercial en la estructura política de Buenos Aires. El intento de fortalecer la legislación colonial con respecto a las elecciones del Cabildo lo prueba. Cuando los intereses orientados hacia el mercado interno gobernaban Buenos Aires, el Cabildo parecía una Junta de Encomenderos y la composición del Cabildo estaba principalmente restringida a los miembros reclutados por los métodos tradicionales de la elección.

El estado colonial municipal intentaba garantizar, de acuerdo a las costumbres tradicionales españolas, que la elección de los miembros del Cabildo estuviera "libre" del

poder absoluto del estado y la iglesia metropolitanos, en otras palabras, "libre" del gobernador, de la Audiencia, del obispo, o de cualquier influencia extra-corporativa. Cuando la penetración del capital comercial estaba en juego, como en 1607, el Cabildo de Buenos Aires hizo lo posible para impedir que la Real Audiencia de Charcas vendiera los oficios públicos de Buenos Aires.<sup>158</sup> De nuevo en 1615, el Cabildo de Buenos Aires se rehusó a admitir al Regidor Juan de Bracamonte, quien había adquirido el oficio de fiel ejecutor en la Real Audiencia de Charcas.<sup>159</sup>

Además, los cabildantes Beneméritos hicieron de las elecciones capitulares una cuestión muy seria. En las elecciones de 1614, por ejemplo, el Alcalde Francisco de Salas Videla, el alférez real Bernardo de León, y los regidores Gonzalo de Carvajal y Miguel del Corro, insistieron que aquellos en prisión debieran de retener, de acuerdo a viejas reglas tradicionales, sus derechos al voto.<sup>160</sup> Una vez que el alcalde Benemérito Domingo Gribeo, quien estaba en la cárcel, modificó su posición política y se volcó a la facción Confederada, los cabildantes Beneméritos cancelaron su queja y denunciaron al Teniente-Gobernador Mateo Leal de Ayala y al Tesorero Real Simón de Valdéz, ambos activos contrabandistas, por haber solicitado en varias oportunidades votar a favor de Domingo Gribeo, un procedimiento que estaba prohibido.<sup>161</sup> Más luego, en Febrero de 1619, los terratenientes encomenderos Gerónimo de Benavídez y Cristóbal Ximénez, ambos regidores electos que pertenecían a la facción Benemérita, fueron removidos de sus oficios por los Confederados sobre la base de que los nuevos cabildantes propietarios, o regidores perpetuos, tenían prioridad por sobre los electos.<sup>162</sup> Finalmente, durante la gobernación de Céspedes todos los cabildantes que no estuvieron de acuerdo con las políticas del Gobernador fueron forzados a retirarse del Cabildo y nuevos miembros más obsecuentes fueron admitidos.<sup>163</sup> Esta inestable situación duró 18 años, desde 1614 hasta 1632, cuando finalmente el Rey intervino.<sup>164</sup> Sorprendentemente, la corona intervino cuando un constreñimiento interno directo, una rebelión indígena, estalló en el norte de la provincia del Río de la Plata.<sup>165</sup>

## **A-IX Requisitos de elección capitular.**

A fin de garantizar la legitimidad política y de evitar diferentes fuentes de conflicto, los requisitos de elección capitular estaban regulados por una legislación muy estricta. Los miembros de los Cabildos eran votados en sus funciones sólo por los miembros precedentes. Aquellos miembros precedentes de los Cabildos no podían votar por extranjeros, funcionarios reales, deudores del estado, parientes, funcionarios excomulgados, pulperos, artesanos o por ellos mismos.<sup>166</sup> Inicialmente, la identidad de quien votaba a cada cual se mantuvo secreta. Subsecuentemente, las elecciones fueron hechas públicas. Los Acuerdos del Cabildo, en 1634 comenzaron a registrar el voto de cada elector. Desafortunadamente, es imposible asegurar la verdadera motivación detrás de cada votación, por cuanto el Cabildo registraba solo la opción individual final tal como era expresada en la asamblea formal. Para evitar posteriores desafíos que pudieran invalidar la elección y la producción de empates que habilitarían al Gobernador para intervenir y desempatar, los funcionarios municipales mantenían reuniones informales donde podían llegar a acuerdos mutuos previos a la asamblea formal.

El hecho de que hubiera elecciones capitulares, sin embargo, no transformaba necesariamente al Cabildo en una institución representativa. Elecciones hubo en la antigüedad griega y romana y también en las universidades y ordenes religiosas de la edad media.<sup>167</sup> La influencia mercantil sobre las elecciones del Cabildo estaba garantizada por la

naturaleza venal con que se adquirirían algunas funciones públicas. El alguacil mayor y el depositario general tenían garantizado "voz y voto" en el concejo, desde los comienzos de la colonización, sin haber sido elegidos. Como tenían el derecho de hablar y proporcionar sus votos anualmente, ejercían una gran y duradera influencia en las deliberaciones capitulares. Más aún, era posible para ellos perpetuar su poder. Por ejemplo, Bernardo de León duró como Depositario General desde 1606 hasta 1637, votando en cada asamblea anual en un período de treinta años. En una forma similar, Francisco González Pacheco duró como alguacil mayor desde 1618 hasta 1657, votando en varias asambleas cuando su pobre salud se lo permitía. De manera semejante, la influencia mercantil sobre las elecciones capitulares se incrementó con la admisión de los funcionarios de la Tesorería Real en el cabildo. En 1614 y entre 1619 y 1621, el Cap. Simón de Valdéz, el Tesorero Real, y los Contadores Reales Tomás Ferrufino y Luis de Salcedo, participaron en las asambleas anuales, influyendo así poderosamente en las elecciones concejiles.<sup>168</sup> Por lo tanto, el Cabildo no representaba al vecindario, mas bien, representaba grupos de intereses contradictorios. No obstante, los funcionarios capitulares estaban naturalmente mas ávidos de complacer a sus electores que al Gobernador o a la Audiencia, y celosamente sostenían los privilegios de la ciudad contra los de la corona.

La elección anual de los miembros del cabildo sólo afectaba a los alcaldes ordinarios y a los alcaldes de hermandad. Los primeros eran los propios magistrados capitulares. El alcalde de primer voto se desempeñaba como alcalde, una función ejecutiva, mientras el alcalde de segundo voto, se desempeñaba como un funcionario judicial de primera instancia.<sup>169</sup> También tenían que desempeñarse como vicegobernadores y notarios. Además de la litigación criminal, sus deberes concernían a los litigios civiles (la redacción de legados y sucesiones, la apertura de testamentos, la confección de inventarios, y la adjudicación de herencias).<sup>170</sup> Su legitimidad dependía de la forma en que administraban justicia y en el grado en el que los crímenes comunes y los pecados públicos, tales como el concubinato, el juego clandestino, la usura, la idolatría, la brujería, la adivinación y la blasfemia, eran castigados.

Los alcaldes de Hermandad representaban el control urbano de la campaña. Ahí compartían el control con el corregidor o protector de naturales, quien había sido designado asimismo por el Cabildo, y con mayordomos y capataces de chacras y estancias. Eran elegidos anualmente entre los estancieros más poderosos. Su deber era aprehender los cuatrerros y esclavos fugados en la campaña.<sup>171</sup>

Además de las alcaldías ordinarias y de las alcaldías de la hermandad, había otros seis puestos electivos en el concejo de Buenos Aires. El alferez real, el fiel ejecutor, el procurador general, el defensor de menores, el mayordomo de propios, y el mayordomo de hospital eran elegidos por el Cabildo de entre sus propios miembros. El alferazgo (oficio del portaestandarte) era un cargo esencialmente ceremonial, que tenía precedencia sobre las otros cargos públicos, a causa del prestigio conferido por la permisión de portar el pendón real en ceremonias civiles y religiosas. El hombre con este cargo tenía precedencia sobre todos los demás miembros del Cabildo; este puesto se situaba justo debajo del de los alcaldes ordinarios.<sup>172</sup> El alferazgo fue vendido por primera y última vez en 1631 a Juan de Tapia de Vargas. Aunque no hay registros escritos del precio pagado por Tapia, sabemos merced a Parry (1953), que el precio pagado por los alferazgos cotizaba entre dos y tres veces el precio de los regimientos o regidurías.<sup>173</sup> En 1639, sin embargo, como Tapia estaba incapacitado de montar a caballo durante los desfiles, debido a una enfermedad que sufrió en ambas piernas, se lo obligó a renunciar a su puesto. Después de la renuncia de

Tapia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires retuvo el alferazgo a la disposición del Cabildo.

El fiel ejecutor (inspector del comercio) gobernaba los gremios artesanos. El inspeccionaba las tiendas al menudeo, las pulperías, y los talleres de artesanos y establecía los standards para los pesos y medidas y para los precios de todo abastecimiento (con excepción de la carne), que se introducía en Buenos Aires.<sup>174</sup> La panadería, por insumir cuantiosa mano de obra esclava, era el negocio mas cerradamente supervisado por el fiel ejecutor, quien determinaba el precio, la calidad, el peso, y la disponibilidad de pan. Aunque el oficio de fiel ejecutor fue vendido en La Plata (Charcas) en 1615 a Juan de Bracamonte, el Cabildo de Buenos Aires no lo admitió.<sup>175</sup> El procurador general se parecía a un defensor fiscal al extremo que representaba clientes y vigilaba los intereses de todos los vecinos, especialmente de los más pobres.<sup>176</sup> El defensor de menores también servía como abogado, defendiendo los intereses de los menores huérfanos, particularmente cuando el padre o madre viudo contraía segundas nupcias.<sup>177</sup> La mayordomía de propios y la mayordomía del hospital eran oficios semejantes a la Tesorería, elegidos por el Cabildo. Recaudaban las rentas y mantenían las cuentas que eran sometidas al cabildo para su aprobación luego del año de administrado.<sup>178</sup> Finalmente, debe ser especificado que la renovación anual del Cabildo no incluía a los regidores perpetuos (autoridades que detentaban un título perpetuo adquirido). No obstante, a pesar del hecho de que no eran electos, los cabildantes propietarios intervenían en las elecciones municipales. En efecto, sus votaciones reflejaban fielmente un orden de prioridad.

En las elecciones anuales del Cabildo el gobernador contaba los votos, que usualmente promediaban en número la media docena. Dos votos eran sufragados por los alcaldes ordinarios y cuatro por los regidores. Aquellos candidatos que recibían la mayoría (o pluralidad) eran elegidos. Cuando la mayoría no era lograda, el gobernador tenía la responsabilidad de decidir la elección. Tan hondo era el deseo de aspirar a la igualdad que cuando las elecciones resultaban en un empate, los gobernadores, para su desempate, incorporaban el sorteo. Por ejemplo, en 1611, el Gobernador Diego Marín Negrón recurrió "a la inocencia de un menor" para instrumentar el sorteo y resolver la elección entre los candidatos Cristóbal Naharro y Francisco de Manzanares.

Los mecanismos de elecciones y reelecciones del cabildo constituyen un ejemplo ilustrativo de las características del estado colonial que permitieron el surgimiento del bloque histórico colonial. Sin embargo, el más importante motivo de la corona española por evitar el mecanismo electivo era el de impedir la formación de fuertes oligarquías criollas. Los funcionarios intentaron evitar esta oligarquización imponiendo interregnos de uno o dos años como requisitos ineludibles para poder ser reelegidos.

La lucha por dominar a la facción opositora hizo a las hegemonías de cada una de estas facciones transitorias y fluctuantes. El cabildo, que era la institución política principal, que reflejaba este conflicto, mantenía una autonomía relativa debido precisamente a la intensidad de la lucha y al poder de los otros agentes burocráticos opositores (obispos y gobernadores). La relatividad de su autonomía reflejaba el carácter de una elite que se estructuraba a sí misma en relación a los constreñimientos económicos, sociales y políticos externos e internos.

## Capítulo I-A-2: **Crisis orgánica en el estado colonial americano.**

### Índice

- B-I Tradición historiográfica en materia de crisis política y regional
- B-II Crisis de hegemonía del bloque en el poder
- B-III Guerras del siglo XVII
- B-IV Guerras del siglo XVIII

### **B-I Tradición historiográfica en materia de crisis política y regional**

Los historiadores románticos de la Argentina decimonónica arrojaron cruciales cuestiones tales como las causas primarias del conflicto entre el puerto y las provincias y las causas básicas de las crisis internas de las diferentes corporaciones y grupos de interés especiales en la ciudad de Buenos Aires misma. Un poco más tarde, influidos por el boom comercial de la década de 1860, los intelectuales positivistas locales, aún reconociendo la existencia de una suerte de lucha de clases en el Buenos Aires del siglo XVII, negaban que la repercusión de las crisis políticas fuera extrema.<sup>179</sup>

La aguda crisis experimentada por la historia política de la Argentina decimonónica forzó a una nueva tendencia de intelectuales a prestar atención en la base política de la sociedad argentina. Siguiendo esta escuela de pensamiento, Ricardo Levene, el más representativo de la Nueva Escuela Histórica, implementó una perspectiva evolucionista y la superestructura jurídica como criterio para caracterizar las estructuras políticas coloniales, en lugar de analizar las luchas intra-coloniales o las crisis políticas.<sup>180</sup> Sin embargo, a pesar de su conocimiento acerca del derecho colonial hispano-americano Levene fracasó en explicar la razón de la existencia en las colonias hispano-americanas de crisis políticas cíclicas.

Más luego, liberales de izquierda, siguiendo un paradigma idealista y unilineal, consideraron las crisis políticas en la era colonial como acontecimientos progresistas para socavar el régimen corporativo colonial y la estratificación social estamental, así como para debilitar el absolutismo virreinal, su política de despotismo ilustrado y su economía mercantilista. Ellos visualizaron las crisis políticas acontecidas en el seno de los cabildos como una expresión de las libertades coloniales en medio de una sociedad estamental, y la antesala de la emergencia de una burguesía nacional local.<sup>181</sup> Como herramienta contra el liberalismo argentino la escuela Revisionista (nacionalistas) conjuntamente con los nacionalistas de izquierda consideraron que las crisis políticas en la era colonial estaban apoyadas en intereses capituladores orientados hacia el mercado externo (Confederados) y contrarios a la hegemonía de intereses patrióticos y nacionalistas (Beneméritos).<sup>182</sup>

### **B-II Las crisis de hegemonía del bloque en el poder**

El bloque histórico a estudiar era el resultado político de una larga crisis que había durado casi sesenta años. En ocho diferentes ocasiones entre 1580 y 1640, el bloque porteño en el poder alcanzó una crisis de hegemonía y profundas luchas intra-coloniales.

Durante las primeras tres crisis, que obedecieron a un bajo grado de penetración comercial, la hegemonía del bloque en el poder correspondió a las viejas fuerzas orientadas hacia el *hinterland* o mercado interno, que se articulaban esencialmente con la economía de enclave del Alto Perú. Sin embargo, comenzando con la cuarta crisis, que constituyó una suerte de crisis revolucionaria, la hegemonía del bloque en el poder, debido a un alto grado de penetración mercantil, correspondió a fuerzas orientadas hacia el mercado externo. Aparte de la penetración comercial, la manera en que los oficiales públicos adquirieron sus cargos fue también un motivo de crisis. En otras palabras, las posiciones capitulares devinieron en una fuente de crisis dependiendo que fueran fruto de una compra o de una elección.

Durante el comienzo del siglo XVII, los vecinos de Buenos Aires parecían estar menos preocupados acerca de la posibilidad de rebeliones criollas que los peninsulares de la década de 1580, cuando una población criolla en la ciudad de Santa Fé, la mayoría de los mismos mestizos (de origen mixto), amenazaron la hegemonía política de los españoles.<sup>183</sup> Sin embargo, a fines de la década de 1580, una época de actividad comercial decreciente, el Cabildo de Buenos Aires estuvo por primera vez en confrontación con el Gobernador español Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón, sobre su intento de nombrar a algunos de sus parientes en puestos públicos. Como resultado de una impugnación legal, el Cabildo logró en abril de 1589 frustrar los esfuerzos del Gobernador.<sup>184</sup> Inmediatamente después, en 1591, el Cabildo de Buenos Aires, aún representando a los productores orientados hacia el mercado interno, apoyados por el Consejo de Indias, desafiaron al mismo Gobernador Torres de Vera, cuando quiso monopolizar las vaquerías de ganado cimarrón.<sup>185</sup> El principal resultado de esta crisis fue la habilidad demostrada por el Cabildo de Buenos Aires para tomar ventaja de una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas, desafiando así por sí mismo y por vez primera a un agente burocrático externo.

A fines de 1594 el Contador Real Hernando de Vargas, aliado a los productores criollos orientados hacia el mercado interno, desafiaron exitosamente al Gobernador Hernando de Zárate.<sup>186</sup> En esta crisis, el Gobernador español representó por primera vez intereses orientados hacia el mercado externo, mientras que el Contador Real representó por última vez las fuerzas orientadas hacia el mercado interno.

Durante la tercer crisis, en 1607, el Gobernador fue capaz de prevalecer contra los Oficiales Reales dividiéndolos. Hernandarias desafiantemente designó al nuevo Tesorero Real Simón de Valdéz como su Teniente General, públicamente opuesto al Contador Real Hernando de Vargas. Este acto estuvo en contra de la voluntad de la mayoría del Cabildo. Finalmente, Hernandarias, a pesar de la oposición del Cabildo, fue capaz de reforzar su decisión mediante un decreto especial.<sup>187</sup> Durante el mismo año 1607, Hernandarias entró en un conflicto severo con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y Real Hacienda, que había sido acusado de introducir ilegalmente doscientos esclavos.<sup>188</sup> Dos años más tarde, Hernandarias una vez más se enemistó con el Cabildo al asignar voz y voto a su nuevo designado Alguacil Mayor Gaspar Teves y Britos.<sup>189</sup> La principal peculiaridad de esta crisis fue la habilidad del Cabildo de tomar ventaja de las diferencias entre el Gobernador y la Real Audiencia de Charcas con respecto a la venta y designación de escribanos, tenientes gobernadores, y Alguaciles Mayores. Sin embargo, estas repetidas crisis del establishment político hegemónico proveyeron las condiciones objetivas para una toma del poder por las nuevas fuerzas sociales.

Durante la cuarta crisis política (1614), la más crítica de todas, los constreñimientos externos directos fueron leves debido a la vigencia de la Tregua de los Doce Años (1609-1621) entre España y los Países Bajos. Como resultado de esta Tregua los constreñimientos externos indirectos (actividades de contrabando) o, en otras palabras, un alto grado de penetración comercial en Buenos Aires, fueron capaces de provocar una proliferación de corrientes migratorias, muchas de ellas sospechosas de estar constituidas por marranos y cristianos nuevos, de erosionar el poder de la censura y de los oficiales del Santo Oficio, permitiendo la penetración de literatura erasmiana, y de generar asimismo extendidas luchas intra-coloniales. La sola candidatura de Juan de Vergara, una suerte de intelectual orgánico de la facción Confederada, a alcalde en el Cabildo, era capaz de producir una profunda lucha intra-colonial. Los cabildantes Gonzalo de Carboxal y Francisco de Salas Videla (Beneméritos) desafiaron la candidatura de Vergara sobre la base de que mantenía una cerrada amistad con Diego de Vega, un famoso contrabandista Portugués.<sup>190</sup> El orgullo y la vanidad de Vergara fueron profundamente heridos por el hecho de que fue tratado despreciativamente por residentes locales del viejo cuño encomendero, los que continuaban midiendo los valores humanos y el derecho a dirigir los negocios públicos por la cualidad de los ancestros. Para que Juan de Vergara, Sebastián de Orduña, Simón de Valdés, y Tomás Ferrufino, los cabildantes Confederados, fueran capaces de ganar la mayoría del Cabildo, el Teniente Gobernador Mateo Leal de Ayala, una de las cabezas de la facción Confederada (que había reemplazado al Gobernador Marín Negrón, ausente en Santa Fé) tenía que poner en prisión al cabildante Domingo Gribeo y al notario capitular Cristóbal Remón, y liberar de la cárcel a Juan Quintero, quien estaba en prisión por un crimen común. Valdés y Ferrufino también ganaron para su facción al cabildante Francisco de Manzanares, un encomendero y terrateniente, y Felipe Navarro.<sup>191</sup>

En represalia por la manera que Gonzalo de Carboxal actuó, contra la candidatura de Vergara, su voto fue declarado nulo, debido al hecho de que había votado por sí mismo, una actitud que estaba tradicionalmente prohibida.<sup>192</sup> En retribución por la manera en que Francisco de Salas, el suegro del Cap. Gonzalo de Carboxal, votó en el Cabildo, los líderes de la facción Confederada (Simón de Valdés y Mateo Leal de Ayala) procesaron a Salas por su participación en una masacre indígena.<sup>193</sup> Finalmente, veintiseis días después de las elecciones, el Gobernador Marín Negrón, quien aparentemente amenazaba el éxito de la conexión contrabandista, murió en Santa Fé como resultado de un sospechoso envenenamiento, y Domingo Guadarrama, un alguacil menor, quien también amenazaba la conexión contrabandista, fue asesinado en una emboscada.<sup>194</sup>

Grandes dificultades asoman con respecto a esta crisis, primero las volteretas de la crisis, donde por primera vez, debido al alto grado de penetración comercial, las fuerzas orientadas hacia el mercado externo removieron de la posición hegemónica el sector del mercado interno; segundo, el poder de una facción capitular para influir en la designación de un Teniente Gobernador, y su autoridad para despojar a alcaldes legalmente designados de sus derechos al voto; y tercero, la casi total omnipotencia de una facción capitular de activar la lucha intra-colonial dentro del Cabildo. Obviamente, esta situación crítica no podía continuar, y muy pronto la Real Audiencia de Charcas, conjuntamente con el Consejo de Indias, tuvieron que restaurar el poder de las fuerzas orientadas hacia el mercado interno, cuya lealtad a las autoridades reales era incuestionable, restaurando a Hernandarias como el nuevo Gobernador en 1616.

### B-III Las Guerras del siglo XVII

Desde que los juicios de residencia no controlaban mas a la corrupción, y la Guerra de los Treinta Años (1618-48) ya se había desatado, con los piratas holandeses asediando a los bajeles de plata en el Caribe, la corona española decidió controlar sus colonias mediante Visitadores Reales. En 1620, un juez español, Matías Delgado Flores, fue despachado con poderes extraordinarios para investigar la conducta del Gobernador Góngora y para poner fin al contrabando holandés. El Gobernador Góngora encaraba un Cabildo pesadamente influido por la participación de los Oficiales Reales y por el desplazamiento de los cabildantes electos por cabildantes propietarios. De ahí que, Delgado Flores dejó de desafiar a la facción Confederada.<sup>195</sup> Sin embargo, el Gobernador Góngora, a pesar de haber fomentado el contrabando, comenzó en 1621 por socavar la hegemonía Confederada aceptando la Real Cédula de Permisi6n (importaciones españolas directas) y acusando a Diego de Vega y a los Portugueses de introducir mercancías ilegalmente.<sup>196</sup> Algunas consideraciones con respecto a esta crisis merecen mucha atenci6n: primero, el Cabildo, el Gobernador, y los Oficiales Reales, se juntaron por primera vez para resistir exitosamente la intervenci6n formal de un agente burocrático externo, enviado por el Consejo de Indias, quien respondía a las fuerzas orientadas hacia el mercado interno; y segundo, la habilidad del Cabildo para tomar ventaja de una ambivalente circulaci6n de la elite política (cabildantes electos versus propietarios). Finalmente, debido al fracaso de Delgado Flores para controlar la facci6n Confederada, la Audiencia de Charcas tuvo que enviar a un nuevo Visitador en la persona de Alonso Pérez de Salazar.<sup>197</sup>

Como resultado de renovados constreñimientos externos causados por las repercusiones periféricas de la Guerra de los Treinta Años (los Holandeses ocuparon Bahía y bloquearon el puerto del Callao en 1625), la penetraci6n comercial y las luchas intra-coloniales decayeron. Con la ayuda del Gobernador Céspedes, los Beneméritos retornaron a su vieja posici6n de predominancia en los negocios públicos. El Capitán Pedro Gutiérrez, un viejo cabildante Benemérito, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1629 como Alcalde de Primer Voto, y el General Gonzalo de Carvaxal, también un ex cabildante que perteneci6 a la facci6n Benemérita, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1630 para encabezar la expedici6n para recobrar Concepci6n del Bermejo.<sup>198</sup> Durante la sexta crisis política, en 1626-30, el Gobernador fue incapaz de activar la lucha intra-colonial para imponer sus intereses, especialmente dentro de la membresía del Cabildo.<sup>199</sup> Una alianza entre el Cabildo y el clero diocesano de Buenos Aires, en la persona de su primer Obispo, Fray Pedro de Carranza, un seguidor hacia treinta años del Obispo Victoria y del Obispo Trejo, desafi6 al Gobernador Céspedes, sobre la base de que este último, con sus propios hijos, estuvo embarcado en extensas actividades intérlopes, en otras palabras, tratando de competir de una manera desleal con las tradicionales fuerzas orientadas hacia el mercado externo. Más aún, el Gobernador Francisco de Céspedes repiti6 lo que previamente hacia cuarenta años había intentado Vera y Aragón.<sup>200</sup> Logró que sus hijos fueran indultados, en una suerte de acto nep6tico. Sin embargo, cuando los hijos del Gobernador Céspedes fueron designados en puestos militares y Juan de Céspedes fue elegido como regidor, la comunidad entera protest6.<sup>201</sup> Como resultado directo de lo precedente, en septiembre de 1627, el Alguacil Mayor Francisco González Pacheco, anunci6 públicamente que los parientes de gobernadores y virreyes no podían participar en Cabildos ni ocupar puestos públicos.<sup>202</sup> Tan fuerte era la objecci6n oficial al nepotismo que incluso le era prohibido a un regidor dar su voto a un pariente en una elecci6n.

Aparte de la cuestión del nepotismo, otras circunstancias contribuyeron a una creciente animosidad contra los gobernadores. El trabajo del Notario del Santo Oficio de la Inquisición era el de hacer una copia fiel de las respuestas dadas a su Comisario por la índole de los pasajeros que arribaban a Buenos Aires así como la de declarar un manifiesto completo de los objetos secuestrados entre aquellos sujetos encontrados en situaciones ilegales (idolatría, herejía, sexualidad). No es extraño entonces que el Gobernador Céspedes y el Notario Inquisitorial Juan de Vergara se enfrentaran entre sí.

Asimismo, así como el trabajo de escribano de minas, registro y hacienda real fue responsable de chequear la trata de esclavos, investigando los navíos entrantes, conjuntamente con los gobernadores y Oficiales Reales, quienquiera que retuviera estos cargos estaba en una posición económica y política muy crucial. En aquel momento el notario oficial era Juan Antonio Calvo de Arroyo, un abierto defensor del Gobernador Céspedes. Consecuentemente, Vergara se encontró en la necesidad de ponerle fin a su carrera. La manera de hacer ello fue observando el no cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de este Notario. Como Calvo continuaba debiendo parte del precio de su propio oficio a la corona y al vendedor, el Cabildo le impidió usar de su oficio. Socavando al notario de las Cajas Reales, Vergara encontró una forma indirecta de debilitar la posición del Gobernador.<sup>203</sup>

Como resultado directo de esta particular lucha el Gobernador Céspedes puso a Vergara en prisión, y removió --de una forma que puede caracterizarse como el primer golpe de estado en la historia argentina-- a todos los miembros del Cabildo del poder. La alianza del Cabildo y el clero fue capaz de movilizar a la población Portuguesa contra el Gobernador Céspedes y a favor de la liberación de Vergara de su prisión. La movilización activa era el único instrumento político que los Portugueses tenían, dado que como no eran vecinos, estaban legalmente privados de los cargos capitulares. Más aún, el Obispo Carranza se atrevió a excomulgar al Gobernador Céspedes sobre la base de que no respetaba los fueros eclesiásticos.

No obstante, el Gobernador Céspedes logró perpetuarse en el cargo por unos años mas obteniendo la absolución del Obispo y socavando con nuevos informes a la una vez poderosa facción Confederada. En efecto, el Gobernador Céspedes logró el apoyo de varios importantes vecinos tales como Juan de Tapia de Vargas, Diego Ruiz de Ocaña, Jerónimo de Medrano, Miguel de Rivadeneyra y Juan Montes de Oca (un primo de Fr. Juan de Vergara, el Provincial de la Orden Franciscana que apoyó al Gobernador Céspedes), al apoyar al Cabildo en su insistencia de abolir la Prohibición Real contra la introducción de plata y esclavos africanos.<sup>204</sup> Sin embargo, el inestable estado de los negocios no duró mucho, y el Gobernador Céspedes entró en problemas muy pronto con el nuevo Obispo Gabriel de Peralta. En 1630, un conflicto asomó sobre la naturaleza de quién debía "dar la paz". En lugar de enviar un diácono o un presbítero para "dar la paz", el Obispo Peralta humilló al Gobernador Céspedes al designar a un muchacho de doce años vestido con sotana y sobrepelliz.<sup>205</sup>

Para recuperar su imagen autocrática, el Gobernador Céspedes designó a su hijo como regidor por una segunda vez en 1631. Como resultado de esta selección nepótica, la Real Audiencia de Charcas designó a Hernandarias como juez. Inmediatamente después, la corona española despidió al Gobernador Céspedes del cargo, reemplazándolo con el General Pedro Esteban Dávila.<sup>206</sup> Ahora, con la ayuda del Gobernador Dávila, los Confederados volvieron a sus posiciones políticas previas. Como resultado del caos

político y el consecuente debilitamiento de la burocracia colonial, especialmente de su aparato represivo, una minoría se aprovechó de la crítica situación golpeando a la burocracia violentamente. En medio de esta crisis política, cuando el Gobernador Céspedes estaba en el proceso de su renuncia, durante el año 1631, el criollo Chileno Pedro Cajal, un hijo natural del Oidor de la Real Audiencia de Chile, y el Indio Alto peruano Juan Puma asaltaron la Tesorería Real de Buenos Aires robando casi diez mil pesos plata. Una vez que fueron apresados, ambos ladrones fueron públicamente ejecutados.<sup>207</sup> Este evento prueba que en períodos de crisis, cuando los crímenes arreciaban, los perpetradores eran sobrecastigados para enfatizar la superioridad intrínseca del poder Real.

Cuatro interesantes consideraciones asoman fuertemente en conexión con esta particular crisis: primero, el poder del Cabildo para quebrar el bloque burocrático **Benemérito** despojando al Gobernador del apoyo del Notario de las Cajas Reales; segundo, la preponderancia del gobernador sobre el Cabildo, y su autoridad para despojar de sus cargos a los regidores designados y de constituir un nuevo Cabildo; tercero, el completo control por parte de un Gobernador sobre un nuevo Cabildo que el hubiera ayudado a crear; y cuarto, la habilidad del Cabildo para sacar ventaja de la contradictoria relación entre la iglesia y el estado. Por cierto, estas condiciones políticas no podían continuar; la corona tenía que reestablecer la tradicional balanza del poder.

Durante la séptima crisis política, en 1637, la alianza del Cabildo y el Gobernador Dávila se opuso a que el nuevo Obispo Cristóbal de Aresti (del Paraguay) tratara de imponer un tributo eclesiástico denominado **Primicias** (primeros frutos), que gravaría vacas, yeguas, semillas, pollos y lechones.<sup>208</sup> El Cabildo logró rechazar las demandas del Obispo, pero el Gobernador sufrió a su vez el embate del contra-ataque obispal. Un tiempo después, el Obispo Aresti excomulgó al Gobernador Dávila fundado en razones morales que estaban basadas en su escandalosa vida privada (juego y mala vida).<sup>209</sup> Esta vez el Cabildo no pudo apoyar al Gobernador Dávila. Como se probó que el Gobernador tomó prestado una considerable suma de dinero del Tesorero Real Juan de Vallejo, el Cabildo --especialmente Juan de Vergara-- se rehusó a reinstalar a Vallejo en la Tesorería Real a menos que pudiera obtener nuevas fianzas --los fiadores previos habían fallecido-- que aseguraran la garantía de dos mil ducados.<sup>210</sup> Socavando al Tesorero Real, un fuerte aliado del Gobernador Dávila, el Cabildo ayudó indirectamente a arruinar la posición del gobernador. Tres factores asoman en conexión con esta particular crisis: primero, el poder combinado del Cabildo y el Gobernador para predominar sobre la Iglesia; segundo, el poder del Cabildo para quebrar la posición del Gobernador despojándolo del apoyo del Tesorero Real; y tercero, la extremadamente débil posición del Gobernador para encarar la ofensiva combinada de la Iglesia y el Cabildo. Es interesante de notar que estos conflictos inter-corporativos entre el Gobernador y la Iglesia fueron responsables de establecer un conflictivo precedente en las relaciones iglesia-estado.

Finalmente, durante la octava crisis política, en 1640, cuando con motivo de la sangría de la Guerra de los Treinta Años (1618-48) se produce la guerra de emancipación de Portugal, y los comerciantes portugueses son expulsados de todas las colonias españolas, incluida Buenos Aires, el Cabildo porteño se coaliga con el Obispo Aresti, tomando así revancha del anterior fracaso. Con esta coalición se desafía al Gobernador Mendo de la Cueva y Benavidez alegando que estaba tratando de enlistar a los vecinos de Buenos Aires, contra su voluntad, en una expedición militar, supuestamente para cazar ganado salvaje en su propio provecho.<sup>211</sup> Algunos sobresalientes factores asoman sobre esta última crisis: primero, la cambiante naturaleza de la posición política del Obispo;

segundo, el aparente poder del Obispo por sobre el Gobernador; y tercero, la capacidad del Obispo de despojar al Gobernador de su poder político mediante exclusivos medios eclesiásticos. Cuando los prelados iban más allá de su jurisdicción eclesiástica y usurpaban las prerrogativas reales, el excesivo uso de censuras eclesiásticas (excomuniones) era considerado materia judicial. De aquí que, el excesivo uso de la interdicción eclesiástica fue interpretado como constitutivo de **fuerza**. Casos de **fuerza** ocurrían cuando los prelados abusaban de sus poderes judiciales.<sup>212</sup> Sin embargo, considerando que el Gobernador Cueva y Benavídez fue reemplazado por otro Gobernador, pareciera ser que no tuvo la oportunidad de usar de sus derechos para protestar haber sufrido **fuerza**.

Por último, las campañas militares en la segunda mitad del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes (1659-67) registraron una numerosa serie de desertiones. Es de advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano.

#### **B-IV Las Guerras del siglo XVIII**

Y durante el siglo XVIII, en toda América Latina, las consecuencias de las guerras europeas reaparecieron sistemáticamente, particularmente en Buenos Aires, cada vez que la decadente y débil metrópoli española encaró militarmente el creciente dominio del imperio británico. Ocurrió en las Guerras de Sucesión de España (1703-1715) y de la Sucesión de Austria (1739-48); en la de los Siete Años (1762-63), en la de la Independencia Americana (1778-83), y finalmente en las guerras Napoleónicas (1796-1803). Portugal había recuperado en 1670 el control del tráfico de esclavos con las colonias españolas a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la corona de Braganza y la de los Habsburgos.<sup>213</sup> Pero con las guerras, se produjeron nuevas delimitaciones geográficas, desplazamientos del monopolio del tráfico de esclavos, e intercambio de enclaves estratégicos. Para el caso, con la Paz de Utrecht en 1713, Inglaterra desplazó a Portugal del monopolio de la trata esclava en toda América a favor del Real Asiento de Inglaterra, y la corona Española perdió los Países Bajos españoles (Bélgica), Cerdeña, [Nápoles](#), [Sicilia](#) y el [Milanesado](#).

La Colonia del Sacramento, puerto ubicado en la banda oriental del Río de la Plata, cuya función principal consistía en valorizar toda mercancía que pasara por sus muelles, con cada guerra cambiaba rápidamente de metrópoli, según quien resultara triunfante, o más bien según lo que surgiera de la posterior mesa de negociaciones, entabladas en Europa. Después que con motivo de la restauración de relaciones diplomáticas entre las monarquías hispana y lusitana se fundara en febrero de 1680 la Colonia del Sacramento, seis meses después el Maestre de Campo Antonio de Vera y Mujica la ocupó militarmente, y un año más tarde la devolvió a Portugal en forma provisoria en virtud del tratado de 1681.<sup>214</sup> Y cuando veinte años después, Portugal e Inglaterra firman el Tratado de Methuen (1701), España reconoció la propiedad de Portugal sobre la Colonia del Sacramento (Tratado de Alfonsa), se apoderó de ella cuando se desató la Guerra de Sucesión de España en 1705, y la devolvió a Portugal en 1715 producto de la Paz de Utrecht y la consiguiente borbonización de la dinastía española, pero fundó en su lugar en 1724 por obra del Teniente Gobernador Bruno Mauricio de Zavala el Puerto de Montevideo.<sup>215</sup> Un cuarto de siglo después, en 1750, recobró la Colonia del Sacramento por obra del Tratado de Permuta (Madrid), la volvió a perder en 1761 (Tratado de Pardo), la tomó por asalto en 1763 de una flota anglo-portuguesa que trató de reconquistarla, la

entregó a Portugal ese mismo año (Tratado de París) y, finalmente, la destruyó hasta sus cimientos en 1778.<sup>216</sup> Las guerras entre las metrópolis, que afectaban el comercio ultramarino, amén de generar en las colonias escasez y la consiguiente elevación de precios de las mercaderías importadas, la caída de los precios de los frutos exportables, y el alza de los frutos sustitutivos de los importados (vinos, frutas secas, etc.) deberían hipotéticamente haber reducido la exportación de metales y con ella disminuido el premio de la moneda doble, transformado parte de la moneda-mercancía en moneda-circulación y provocado espirales inflacionarias en los escasos productos de importación que restaban en el circuito interno.<sup>217</sup> Sin embargo, en tiempos de guerra entre España e Inglaterra, era rutina saldar las deudas con los monopolistas remesando la plata a Cádiz por medio de puertos neutrales como Bahía o Lisboa.<sup>218</sup>

De aquí que siempre que la guerra ocurrió entre las dinastías Borbónicas de Francia y España, por un lado, y la monarquía Inglesa, garante de la independencia de Portugal, por el otro; la Colonia del Sacramento era tomada por la fuerza; el comercio monopolista al multiplicarse las tasas de riesgo marítimo se desplomaba; el premio de la moneda doble (de ocho reales) caía; el monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico aumentaban; y la sede del contrabando se trasladaba de la Colonia del Sacramento a Buenos Aires. Buenos Aires mismo devino en tiempos de guerra en una colonia periférica, provista por las Cajas Reales de situados o subsidios con fines militares, donde la alianza mercantil se fragmentaba incrementando la presencia de una embrionaria burguesía comercial de origen local constituida por contrabandistas criollos, donde los arrendamientos urbanos y rurales se deprimían arrastrando consigo a la construcción urbana, y donde la autonomía relativa de la burocracia político-colonial se expandía. Por otro lado, la llegada de los caudales a España en tiempos de guerra amortiguaba la inflación que sufrían en la misma Europa los vales reales.

Por último, las expediciones porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII, contra la Rebelión de los Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y más luego por Fernando de Mompóx y Antonio Ruiz de Arellano (1735),<sup>219</sup> o la expedición porteña del Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de las llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56) --derivación del Tratado de Permuta con Portugal (Madrid, 1750)-- registraron también una serie numerosa de desertiones. Tan fue así, que el 20 de Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y libertos se alistaran en las fuerzas que se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de indios "tapes" rebeldes.<sup>220</sup> En la Primera Expedición de Misiones desertaron 25 hombres.<sup>221</sup> En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 1752, los tercios de La Rioja y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.<sup>222</sup>

Este capítulo ha demostrado que los análisis vulgares de los conflictos políticos coloniales necesitan ser reemplazados con un explícito reconocimiento de que las crisis de hegemonía de diferentes niveles de complejidad, son susceptibles de evolucionar en forma diferente como respuesta al mismo estímulo, tal como la penetración del capital comercial o las guerras europeas. Considerando que Buenos Aires era solo un vínculo intermedio en el gran circuito mercantil que se extendía entre Sevilla, Loanda (Angola) y Potosí podemos concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en Buenos Aires a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado externo (contrabandistas de esclavos) y productores orientados al mercado interno, muchos de los

cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos, cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto crónico para obtener hegemonía. Durante los primeros tres conflictos, los intereses orientados hacia el mercado interno lograron preservar su hegemonía dentro del Cabildo. Durante los últimos cinco conflictos ocurridos en la primera mitad del siglo XVII las fuerzas orientadas hacia el mercado externo fueron capaces de hegemonizar subordinando las fuerzas opuestas. En el curso del último conflicto del siglo XVII, fue un suceso externo, la sangría producida en las colonias lusitanas por la Guerra de los Treinta Años, la que desata la emancipación de Portugal, y con ella la expulsión de los Portugueses de todas las colonias españolas, y por consiguiente la derrota definitiva del bando Confederado. Finalmente, el siglo XVIII estuvo plagado de guerras y conflictos que traumatizaron la vida colonial sudamericana, que habremos de investigar en el tomo siguiente.

### **Capítulo I-A-3:      Índole contradictoria de un estado subordinado.**

#### **Índice**

- C-I   Naturaleza contradictoria del estado colonial
- C-II   Gobernadores y los gobernadores-adelantados
- C-III   Oficiales Reales
- C-IV   Escribanos

#### **Introducción del capítulo I-A-3**

La naturaleza contradictoria del estado colonial o subordinado le dio forma a su burocracia y a sus conflictos políticos internos. Cuando el capital comercial llegó a dominar la encomienda y los intereses ligados a la producción agropecuaria y a la economía de enclave del Alto Perú, como lo hizo en la primera mitad del siglo XVII en Buenos Aires, el crecimiento de un grupo de interés mercantil no fue sólo una función del éxito económico, sino también una función del nivel de hegemonía sostenido por los mismos mercaderes en las "sociedades políticas y civiles". A la luz de este hecho, podría decirse que la construcción de un estado colonial nuevo implicaba la transformación de las relaciones sociales de producción y distribución, y de las creencias religiosas, culturales, morales, políticas y sociales predominantes. Simultáneamente, la construcción de un estado colonial nuevo dio nacimiento a una nueva hegemonía mercantil en la lucha contra los constreñimientos externos e internos y por la legitimación de un bloque de poder local.<sup>223</sup>

Aparte de darle forma a la naturaleza del estado colonial, la penetración del capital comercial también dio forma a la naturaleza de los conflictos políticos internos. Este estado colonial era el resultado de antagonismos sociales inscriptos en su propia estructura. Es necesario comprender que los residentes de un estado tal como el de Buenos Aires, no disfrutaban todos de los mismos derechos ni cargaban con las mismas responsabilidades. Las diferencias generadas dentro de la burguesía mercantil de Buenos Aires eran causadas por el desarrollo contradictorio entre los mercaderes orientados hacia el enclave

altoperuano y el mercado interno o *hinterland* (relacionado con los productores de vino, tabaco, azúcar y yerba de las regiones litoraleñas y cuyanas) y los mercaderes orientados hacia el mercado externo (tratantes de esclavos), por las diversas formas de asociación con el capital comercial portugués y por las rivalidades crediticias.

Este conflicto intra-colonial también penetró el bloque ideológico. En un período de crisis ideológica profunda y generalizada, acentuado por la Visita pro-indígena de Francisco de Alfaro, brotó una crisis de confianza en la reproducción espontánea del sistema de dominación imperial-absolutista.<sup>224</sup> Esta crisis de confianza se tornó en una exacerbación de todas las contradicciones ideológicas y en una desintegración de la unidad del discurso ideológico dominante. Como el rol de toda ideología, consiste en transformar individuos en sujetos o agentes históricos, esta crisis ideológica necesariamente envolvió a todos los agentes sociales dentro de una severa crisis de identidad.<sup>225</sup> Cada una de las facciones en conflicto trató de reconstruir una unidad ideológica nueva transmitiendo una descripción que podía desarticular el discurso ideológico de las fuerzas opositoras -los Confederados, por un lado, que transmitían una suerte de reformismo erasmiano (Vives, Moncada, Valdés), y los Beneméritos, por el otro, que transmitían una suerte de etnocentrismo y disciplinamiento sexual y marital inquisitorial.

Los intereses orientados hacia el mercado interno y externo, agentes tanto de los constreñimientos externos como de los internos, estaban organizados y reorganizados en corporaciones y estamentos (rangos o estados sociales). Estas corporaciones y estamentos luchaban unos contra otros por el control de la sociedad civil. El resultado inmediato de los conflictos intra-coloniales fue el re-acomodamiento de jurisdicciones y áreas de influencia. En la búsqueda de poder, cada facción en conflicto deseaba controlar y manipular los recursos administrativos y judiciales y asegurar para sí la porción más grande posible de los ingresos de la administración pública. El clásico conflicto de intereses en el Buenos Aires colonial se desarrolló dentro de una minoría diminuta, privilegiada. Durante este período la gran masa de mano de obra productiva, indios y esclavos, sólo prestaron un apoyo pasivo a los rivales en conflicto. Además, la inmigración portuguesa, con la mezcla consecuente de razas, ayudó a eliminar los límites de una estratificación social estamental y dio lugar a un tipo peculiar de conflicto social propio de un orden imperial-absolutista, conocido como conflicto intra-colonial. Este tipo de conflicto consistía esencialmente en conflictos inter-estamentales.

En las ciudades interiores, donde los intereses orientados hacia el mercado interno prevalecieron, los Oficiales Reales ejercían una muy débil influencia y los Cabildos eran controlados casi exclusivamente por los encomenderos. Después de 1602, en Buenos Aires, el capital comercial o los intereses orientados hacia el mercado externo, y los empresarios no-encomenderos (Confederados) gradualmente devinieron dominantes. Sin embargo, no dominaron completamente el Cabildo; los Oficiales Reales aún mantenían una fuerte influencia.. De ahí que el Cabildo devino un campo de batalla donde ambos bandos luchaban por la hegemonía. Los Beneméritos decían representar el partido del orden, mientras los Confederados eran acusados de representar el partido de la anarquía. Cada una de estas facciones trató de alcanzar legitimidad y subordinar a los otros mediante luchas inter-corporativas. Era como Jacques Heers se refería a las ciudades de la Italia Medieval "...poder o exilio para cada facción, victoria total o al menos la pérdida temporaria de toda influencia e incluso de toda propiedad para sus líderes".<sup>226</sup>

En las colonias centrales del Imperio español tales como México o Perú, los principales conflictos inter-corporativos arreciaron entre virreyes y audiencias, o entre arzobispos y virreyes. En las colonias periféricas, como Buenos Aires, la puja arreció entre el Consejo de Indias, el virreinato Peruano, la Real Audiencia de Charcas, el Arzobispado de Charcas, y la gobernación del Río de la Plata.

Una vez que un equilibrio de poder externo fue logrado, permaneció aún inestable una crítica lucha interna. Internamente, la lucha más decisiva ocurrió entre gobernadores, cabildos, funcionarios reales y obispos o, dentro mismo de diferentes corporaciones (Beneméritos versus Confederados dentro de los miembros del Cabildo), afectando así el necesario equilibrio de poder entre ellos. El equilibrio de poder significaba la distribución de poder en la colonia de manera tal que ningún poder burocrático individual, ni el cabildo, ni el gobernador, ni el obispo, ni los funcionarios reales, ni el Alguacil Mayor, le fuera permitido volverse tan fuerte como para dominar o imponer a los otros poderes y cambiar entonces el equilibrio existente.

La administración colonial habsburga se volvió a juicio de Phelan no tanto en una cuestión de comando vertical desde la metrópoli española, como un sistema de frenos y contrapesos de las instituciones burocráticas autogobernadas. Cuanto más tiempo el burócrata real permanecía en su cargo, más obvias se volvían las tendencias contradictorias del dual concepto habsburgo de autoridad y control.<sup>227</sup> En opinión de Phelan, el estado español fue un converso tardío al absolutismo, entendiendo por este el del despotismo ilustrado.

### **C-I Naturaleza contradictoria del estado colonial**

Sin embargo, cuando la balanza del poder cambiaba la lucha intra-colonial estallaba. Esta lucha era estimulada por la naturaleza contradictoria del estado colonial, por cuanto comprendía una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas, una relación inconsistente con la iglesia colonial, una división incoherente del poder temporal o secular, una circulación ambivalente de la élite política, y una distribución contradictoria de los derechos ceremoniales o protocolares.

Primero, a diferencia de los estados-nación independientes, el estado colonial o subordinado experimentó una subordinación a las autoridades metropolitanas. En un estado colonial periférico, esta subordinación generaba entre las corporaciones locales (Audiencias, cabildos, obispados, gobernaciones) una amplia competición por el favor Real. Obispos y gobernadores al igual luchaban entre sí por el favor Real. Esta competición por los favores políticos del estado superior o metropolitano generaba múltiples conflictos. La lucha contra el gobernador, comenzaba en Buenos Aires, pero era transferida a las cabeceras del estado superior, Sevilla y Madrid. Ahí se mezclaba con la rivalidad interna de las facciones españolas que trataban de impulsar a sus propios candidatos para la gobernación así como sus propias políticas, o intentaban proteger al Gobernador que el Rey había designado a su instancia. En estas circunstancias, como resultado de la débil situación económica de Buenos Aires, debido a la prohibición de exportar plata, las peticiones dirigidas al Rey en el siglo XVII eran escritas por los Procuradores Generales Fray Martín Ignacio de Loyola (1600), Manuel de Frías (1612), y Antonio de León Pinelo (1623), en defensa del comercio con Sevilla como con Bahía, y contra el control monopólico del comercio legal por parte de Lima. El común denominador de estas posiciones eran las quejas acerca de los altos precios de la mercancía Europea en

el Alto Perú y la escasez monetaria y laboral en Buenos Aires. Estos tres abogados del comercio libre argumentaban que los ítems importados por Buenos Aires desde España o Brasil no serían directamente competitivos con aquellos importados por Perú desde España debido a la enorme distancia entre estas dos regiones. Ellos agregaban que aunque las concesiones o permisiones que podían ser otorgadas a Buenos Aires podrían disminuir el tamaño de las tradicionales flotas de galeones, estas pérdidas serían compensadas con los ingresos que Buenos Aires obtendría.<sup>228</sup> Los resultados prácticos de estas quejas fueron esencialmente una política poblacional orientada hacia las importaciones de mano de obra africana esclava y una política territorial orientada hacia una estrategia de gran productor o expansiva de desarrollo rural. Polemizando con esas quejas hubo también peticiones en defensa de las políticas proteccionistas. No obstante, el proteccionismo en el periodo colonial, a pesar de su carácter militante, no tenía una impronta industrial, y se restringía a los intereses de cada sector regional: productores de azúcar, tabaco, y yerba mate del Paraguay, y productores de vino y aguardiente de Cuyo promovían peticiones, protestas y otras expresiones proteccionistas. Como resultado de esta competición por el favor Real numerosos conflictos inter-corporativos se desataron.

Por sobre la competición por el favor Real, las autoridades locales competían por el favor del virrey Peruano y de la Real Audiencia de Charcas, institución esta última emplazada en medio de una verdadera economía de enclave. Por ejemplo, algunas peticiones se dirigían a la Real Audiencia de Charcas pidiendo la remoción de gobernadores y teniente-gobernadores así como el envío de Visitadores.

Segundo, a diferencia de las democracias liberales del siglo XIX tardío, el estado colonial no experimentó una separación de iglesia y estado. En otras palabras, en un orden imperial-absolutista, debido a la institución del Patronato Real, cada una de estas esferas (iglesia y estado) se encimaban unas a otras, deviniendo una fuente de conflicto real.<sup>229</sup>

Las Leyes de Indias conferían a los Gobernadores de Buenos Aires un poder total para cumplir los derechos del Patronato Real. La esencia de este patronato era el derecho de representación. Cuando quiera que un cargo eclesiástico bajo como el diacono o el archidiacono estaba por ser designado, el candidato era presentado al Obispo de la diócesis de Buenos Aires por el Gobernador.<sup>230</sup> Mientras que los obispos eran capaces de excomulgar y absolver autoridades publicas, los gobernadores y las Reales Audiencias eran responsables de erigir iglesias, capillas y hospitales, autorizar el establecimiento de ordenes religiosas y la celebración de sínodos o concilios provinciales, expulsar curas escandalosos, asegurar la absolución de las excomuniones, y administrar la educación, la salud y la caridad. Mediante la excomunión, los obispos podían evitar que los gobernadores administraran justicia, mantuvieran disciplina en los ejércitos, guardaran a los delincuentes en las cárceles, y presidieran sobre las asambleas capitulares anuales donde las nuevas autoridades municipales eran electas.

Tercero, de nuevo a diferencia de las repúblicas liberales del siglo XIX, el estado colonial no practicaba el mito de la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.<sup>231</sup> Muchos de los funcionarios coloniales compartían esas mismas funciones, aunque en diferentes proporciones. Cada uno de los cargos mas altos del gobierno desde el Consejo de Indias hasta las Audiencias, los cabildos, y los corregimientos, de acuerdo con Phelan, "combinaban ambas autoridades judiciales y administrativas".<sup>232</sup> En otras palabras, cada una de las tres ramas propias de la sociedad política de un estado liberal, en un orden imperial-absolutista se fragmentada entre diferentes autoridades, deviniendo así en una

permanente fuente de conflictos. Por ejemplo, la administración de justicia estaba compartida por el alcalde de segundo voto, el Teniente gobernador, los Oficiales Reales, la corte eclesiástica, el Santo Oficio de la Inquisición, los tribunales militares, y la Real Audiencia. También, el control de la coerción directa era compartido por gobernadores, obispos, alguaciles mayores, alcaldes de primer voto, Reales Audiencias, y Alcaldes de Hermandad. Esta confusa manera de mezclar los diferentes roles públicos estaba llevada a tan alto grado que era muy difícil distinguir a un militar de un cabildante. Ambos funcionarios desplegaban simultáneamente autoridad militar y legislativa tomando parte en las sesiones capitulares exhibiendo más el rango militar que el municipal. Esencialmente, la confusa exhibición de rangos fue finalmente liquidada. En 1668, el cabildante Alonso Esteban de Esquibel se quejó acerca de la manera que el Corregidor Pedro de Ocampo entró en la asamblea capitular, vistiendo su insignia de Capitán a Guerra. Esquibel pidió a Ocampo que abandonara la sesión para poder discutir la manera correcta en que debía exhibir su uniforme de ahora en más. Ocampo replicó rehusándose a dejar la sesión. Finalmente, el caso fue llevado a la consideración de la Real Audiencia.<sup>233</sup> Este alto Tribunal judicial puso fin a esta interminable discusión, sobre rituales, ordenando al Corregidor no llevar espada en las sesiones capitulares, pidiéndole en su lugar que llevara la vara.<sup>234</sup>

De un modo similar, la facultad de votar leyes y regulaciones, que el estado superior (corona española) delegaba en sus estados subordinados, fue compartido por los miembros del Cabildo (regidores), los miembros del capítulo catedralicio, los sínodos eclesiásticos, y el Consejo de Indias. Cuando los Cabildos necesitaban extender sus poderes para decretar leyes tributarias, los gobernadores convocaban a cabildo abierto, y haciendo esto, los cabildos evitaban conflictos y resistencias. El cabildo abierto era una clase especial de asamblea local que servía, en una de sus funciones, de foro público general para consolidar el bloque de poder reclutando grandes segmentos de la "sociedad civil". La inclusión de presbíteros y artesanos significaba que en esta clase de sesiones se podía formar un bloque más extenso, con diferentes corporaciones y gremios. Como ejemplo, los gobernadores en Buenos Aires convocaron a Cabildos Abiertos en 1632 para construir fuertes, y en 1658 para recaudar subsidios militares.<sup>235</sup>

Cuarto, el estado colonial no reclutaba y promovía la elite política exclusivamente a través de medios electorales pero también lo hacía a través de la pública subasta de los oficios públicos (regidurías, alguacilazgos, alferazgos). Estos dos mecanismos competitivos de reclutamiento de elites constituían una fuente permanente de conflictos. Por ejemplo, entre el Alférez Real y el Depositario General se desataban conflictos muy a menudo. Dichos conflictos surgían en parte del hecho de que el Alférez Real era un funcionario electo, mientras que el Depositario General era un cargo venal, adquirido en subasta pública. El Depositario General Bernardo de León disputó dos veces su derecho a hablar, sentar y emitir su voto con prelación al Alférez Real. Pasó primero en 1608 contra la queja de Víctor Casco de Mendoza, y de nuevo diez años más tarde en 1618, contra el reclamo del General Enrique Enríquez.<sup>236</sup>

Finalmente, a diferencia también de las democracias liberales, en un estado colonial subordinado, sumido en un barroquismo legal como Buenos Aires, la constante y profunda preocupación de los magistrados con el honor y el protocolo constituía una crónica fuente de conflictos. Consistentes con la estructura estamental del orden imperial-absolutista de su tiempo, los administradores públicos, en Buenos Aires y otros lugares, asignaba la más alta relevancia a las desigualdades de rango, precedencia, protocolo, y

reputación. Por lo tanto, eran extremadamente susceptibles cuando devenía en una violación de sus prerrogativas, privilegios de rango, y símbolos de vanagloria y arrogancia.

Aunque las fuentes burocráticas de los conflictos coloniales eran importantes, la principal fuente de conflicto entre Beneméritos y Confederados residía en las políticas económicas adoptadas. Cuando quiera que los Confederados tomaban el poder, el control del comercio era levantado y el peso fiscal de apoyar al gobierno municipal revertía a los productores orientados hacia el mercado interno. La dominación de los Confederados tendía a fomentar la participación en el comercio internacional, debido a la naturaleza abierta inherente a las economías de librecambio. Consecuentemente, la hegemonía Confederada ayudó a elevar el valor comercial de los oficios públicos.

Con el fin de acelerar el proceso de emisión de licencias la dominación de los Confederados, que controlaban a los Oficiales Reales, tendía a subvaluar la mercancía secuestrada. Durante la gobernación de Marín Negrón (1610-1614) los esclavos fueron tasados invariablemente a \$70 cada uno. Contra las recomendaciones reales para elevar drásticamente el valor al que los esclavos eran vendidos en las subastas publicas, el Gobernador Beaumont y Navarra elevó la tasación del esclavo en 1615 a solo \$100. En 1619, bajo el Gobernador Góngora, fue elevada solo a \$144.<sup>237</sup> Inversamente, cuando los Beneméritos asumían el control, los gobernadores tendían a sobre-valorar la mercancía secuestrada con el fin de proteger los productos nativos, elevar los ingresos Reales, y atribuir a los intereses orientados hacia el mercado externo la responsabilidad de apoyar financieramente al gobierno municipal. De esta manera los altos precios en las subastas públicas operaban como tarifa proteccionista. Haciendo ello los Beneméritos tendían a reducir el valor comercial de los oficios públicos.

Aparte de proveer una importante fuente de ingresos, las tarifas proteccionistas tenían la ventaja adicional de derivar hacia los comerciantes parte de la responsabilidad para extraer el excedente económico de las clases subordinadas o castas. Esto hizo más difícil que los Confederados pudieran culpar a la elite Benemérita, como lo habían hecho en el pasado. Cuando Hernandarias, representando a los intereses orientados hacia el mercado interno, tomó el poder en el período 1606-1609 y 1615-1618, el valor de un esclavo alcanzó los \$200.<sup>238</sup> De igual manera, cuando estos mismos intereses prevalecieron, entre 1603 y 1605, el Cabildo de Buenos Aires otorgó a los herederos de los primeros pobladores el monopolio sobre el ganado realengo. De la misma forma, entre 1620 y 1623, bajo el Visitador Alonso Pérez de Salazar, los gravámenes de la alcabala fueron forzados.<sup>239</sup>

Políticas fiscales discriminatorias referidas a la introducción de vino Portugués y de madera y azúcar Brasilera fue la seria respuesta a los constreñimientos externos indirectos (contrabando). En 1614, las autoridades Confederadas, con el fin de frustrar a los productores orientados hacia el mercado interno fomentaron la introducción de vinos extranjeros.<sup>240</sup> Un año más tarde, sin embargo, las autoridades Beneméritas obtuvieron la protección del vino, la miel, y el azúcar que venían del Paraguay, prohibiendo la entrada de dichos productos desde el Brasil.<sup>241</sup> Pero una vez que el Gobernador Diego de Góngora asumió el poder en 1618, el vino Paraguayo fue una vez mas desalentado del mercado en beneficio de los vinos Portugueses.<sup>242</sup> Pareciera ser que el vino Paraguayo adquirió una mala reputación debido a una propaganda fomentada por el Cabildo y por los comerciantes Portugueses deliberadamente propalada con el objetivo de eliminar la improductiva elaboración doméstica de vinos y aguardientes

El grupo económico predominante también determinó las políticas fiscales no necesariamente relacionadas con el comercio. Es mi hipótesis que cuando los intereses orientados hacia el mercado externo estaban en el poder, la autoridad discrecional se expandía, y la corrupción, el soborno, y las extorsiones se incrementaban. Esta política discrecional estaba facilitada por el hecho que la jurisdicción final en materia fiscal pertenecía a una instancia estatal superior, la distante Audiencia de Charcas. A pesar del hecho que el salario oficial de los gobernadores era solo de 3.000 ducados (o \$4.125 pesos de ocho reales) anuales, el Gobernador Marín Negrón, como lo muestra su testamento, dejó \$80.000 pesos al momento de su muerte, y el Gobernador Góngora dejó mas de \$20.000.<sup>243</sup> Los Tenientes Gobernadores, sin salario formal, eran conocidos por su extrema corrupción. Los casos de Mateo Leal de Ayala, en 1615, conocido como socio en el negocio ilegal de Diego de Vega y Juan de Vergara, y de Diego Páez Clavijo, en 1620, eran los más notorios. Lo mismo era verdad para los Oficiales Reales. Tesoreros y Contadores ganaban ostensiblemente apenas \$1.286 anuales. Su riqueza actual, al final de la tenencia del puesto, sin embargo, era mayor que varias veces este monto.<sup>244</sup> El miedo al secuestro o confiscación causado por los juicios de residencia, sin embargo, indujo a los funcionarios públicos a guardar sus ahorros en moneda contante y sonante antes que invertir en el mercado inmobiliario de Buenos Aires.

Que una política fiscal tendiera a activar o desactivar una lucha intra-colonial dependía largamente del grupo que ocupara la posición predominante en el poder. Sobre todo, este resultado dependía en si la política fiscal estaba fundada en los intereses orientados hacia el mercado interno o el externo. Estos cambios pendulares en políticas fiscales dependían esencialmente del grado de constreñimientos externos.

Desde que los comerciantes orientados hacia los mercados externos fueron influenciados por la naturaleza contradictoria del estado colonial, la posición negociadora de los funcionarios públicos con relación a estos comerciantes debe tomar en cuenta esta contradicción. Aquellos que apoyaran al Gobernador recibirán beneficios proporcionales (e.g.: promociones militares, integración en los cabildos, tierras públicas, etc.). Finalmente, los funcionarios del estado subordinado (gobernadores, oficiales reales), y los comerciantes orientados hacia el mercado externo, luego de intensos y a veces violentas negociaciones, alcanzaban a llegar a algún acuerdo, el cual se reflejaba en la composición política de los cabildos. Dos objeciones principales fueron promovidas a los gobernadores y los cabildos. Una era su complicidad en los constreñimientos externos indirectos (actividades de contrabando), y la otra eran los abusos en el poder para designar funcionarios. La primera consistía en la aceptación de sobornos y restituciones por parte de comerciantes de esclavos y Oficiales Reales. La última era facilitada por la aparente inhabilidad del cabildo para prevenir el nepotismo en las designaciones de los gobernadores.

En el manejo de la coerción era posible en ese entonces tener una variedad de instancias burocráticas comandando fuerzas y administrando justicia, ejerciendo un poder multipolar, dentro del mismo territorio.

## **C-II Los Gobernadores y los gobernadores-adelantados**

Los Gobernadores y los gobernadores-adelantados, aunque formalmente representaban al Rey, en la práctica se afiliaban a los intereses locales. Aparte de sus

obligaciones para llenar los cargos de milicia, los gobernadores tenían la responsabilidad de llenar las vacantes en el clero secular y los puestos civiles, de erigir iglesias y hospitales, de convocar Juntas de Guerra, de decidir votaciones empatadas en las elecciones concejiles, y el de asignar mercedes de tierras y encomiendas vacantes. Distribuyendo mercedes reales e indios encomendados los gobernadores lograban una fuerte presencia en los ámbitos económicos. Pero cuando quiera que los gobernadores se ausentaban los alcaldes ordinarios venían a reemplazarlos, con todos los poderes del gobernador. Un similar proceso de delegación ocurría cuando, durante el segundo gobierno de Hernandarias (1609), los gobernadores comenzaron por designar Tenientes Gobernadores. Esta nueva designación incluía el rango de General, el poder de juzgar en casos de apelación de decisiones judiciales tomadas por los Alcaldes ordinarios, y el poder de participar en las asambleas concejiles. El consiguiente solapamiento de instancias judiciales entre la Audiencia de Charcas y los Tenientes Gobernadores, dentro del sistema judicial colonial, devino en una fuente de permanentes conflictos burocráticos. Por ejemplo, ya en 1607, el Gobernador Hernandarias se vio envuelto en un severo conflicto con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y de la Real Hacienda, quien había introducido ilegalmente en el pasado reciente alrededor de 200 esclavos.<sup>245</sup> Subordinando la gobernación del Río de la Plata al control judicial de la de la Real Audiencia de Charcas en 1608, el Consejo de Indias fue capaz de equilibrar el poder del Gobernador paraguayos así como la influencia local de la elite Benemérita. Mas tarde, cuando los intereses orientados hacia el mercado externo de la elite Confederada a través de los Tenientes Gobernadores, como Mateo Leal de Ayala en 1614, Diego Páez Clavijo en 1623, y Francisco de Céspedes en 1627, desequilibraron a los intereses Reales, la Real Audiencia de Charcas intervino mandando Visitadores para restaurar tanto la balanza del poder externo como la del interno.<sup>246</sup>

El alguacil mayor simultáneamente servía a los gobernadores y al cabildo como funcionario judicial, responsable del cumplimiento de la ley y de la designación de los carceleros. Para el cuidado de la ciudad y la libertad de sus vecinos, el Alguacil dependía del Cabildo.<sup>247</sup> De esta manera, la oficina del Alguacil Mayor devino extremadamente estratégica y valiosa para las actividades relacionadas con el tráfico ilegal. Para las funciones policiales el Alguacil era un subordinado del Gobernador. Más aún, el Alguacil Mayor era responsable de designar alguaciles menores en las parroquias. Como este ultimo estilaba abusar de sus prerrogativas derivando los excedentes extras procedentes de aquellos miembros de los estamentos inferiores que practicaban actividades ilegales, muy a menudo estallo la violencia. De aquí que, no era posible para un funcionario público tener por mucho tiempo tan contradictoria variedad de jurisdicciones en un equilibrio pacifico, sin definir sus límites.

### **C-III Los Oficiales Reales**

Los Oficiales Reales eran aquellos funcionarios principalmente responsables de recaudar los ingresos Reales, quienes también poseían autoridad judicial para llevar a cabo sus mandatos. Los dos más importantes Oficiales Reales fueron el contador y el tesorero. El hecho de que ni los gobernadores ni los Alcaldes tuvieran las llaves de la Tesorería Real y no pudieran intervenir en sus funciones hizo que estos dos funcionarios públicos fueran independientes y poderosos.<sup>248</sup> Las demoras en expedir las cuentas, debido a las dificultades atmosféricas para los navíos que atravesaban el Atlántico, incrementó la

importancia del efectivo existente y transformó a la Tesorería en un verdadero banco local. Amén de recaudar los ingresos aduaneros, los Oficiales Reales eran responsables de subsidiar los **socorros** (tropas de milicia) procedentes de España en su camino a Chile (1585, 1601, 1605, y 1623), así como para el envío de los excedentes fiscales de Buenos Aires (una oficina de tesorería subordinada), a las oficinas de tesorería principales de Chile, Alto Perú y Paraguay.<sup>249</sup>

Asimismo, los Oficiales Reales eran responsables de investigar (visitar) los navíos entrantes. Desde la gobernación de Hernando de Zárate (1594-1595) hasta el final de la segunda gobernación de Hernandarias (1609), los gobernadores, siguiendo las Ordenanzas de Madrigal de 1591, estilaban investigar los navíos entrantes sin la presencia de los Oficiales Reales.<sup>250</sup> Pero comenzando con la gobernación de Diego Marín Negrón (1609), los gobernadores debían inspeccionar los navíos entrantes, siguiendo las nuevas regulaciones que prescribían la recaudación del almojarifazgo Real, en compañía de los Oficiales Reales.<sup>251</sup> Esta responsabilidad conjunta obligó a ambos gobernadores y Oficiales Reales a llegar a un acuerdo relacionado con la valuación de la mercancía secuestrada.

Cuanto más alta la valuación de los ingresos mercantiles que correspondían a la corona más alto el valor comercial de los oficios públicos correspondientes. El funcionario público que encontraba los ítems contrabandeados tenía primero derecho a un tercio de la mercancía secuestrada.<sup>252</sup> Los Oficiales Reales, amén de ser responsables (conjuntamente con el gobernador, el Comisario del Santo Oficio, el notario, y el Alguacil Mayor) de inspeccionar los navíos entrantes, de confiscar la mercancía contrabandeada, y de formular las preguntas concernientes a los objetos religiosos no católicos y los libros prohibidos, tenían el derecho de evaluar los ítems que eran secuestrados para venderlos en subasta pública.<sup>253</sup> En 1620, sin embargo, el Gobernador Góngora excluyó a los Oficiales Reales de cualquier intervención en casos de introducción ilegal de esclavos africanos, y retuvieron para ellos los derechos a un tercio de la mercancía secuestrada.<sup>254</sup> De resultados de la controversia concerniente a este punto, se siguió un debate en el Consejo de Indias. Luego de un largo proceso judicial el Consejo pronunció un veredicto en 1622 que favoreció a los Oficiales Reales por sobre los gobernadores. Tres años más tarde, a comienzos de 1625, una Real Cedula ordenó que el tercio aduanero de la mercancía secuestrada debía ser distribuida en partes iguales entre gobernadores y Oficiales Reales. Esta controversia terminó recién a fines de 1625 cuando el Rey ordenó temporalmente que los esclavos introducidos sin licencias debían ser considerados libres.<sup>255</sup>

#### **C-IV Los Escribanos**

Los Escribanos estaban también involucrados en esta puja entre los funcionarios públicos concerniente al secuestro de oficios y magistraturas. Los notarios de la Tesorería Real conjuntamente con los gobernadores se suponían que inspeccionaban los navíos entrantes. En caso de descubrir mercancía ilegal debían secuestrarla. Una vez que la mercancía ilegal era secuestrada, las subastas debían ser convocadas. A través de estas subastas y emitiendo las correspondientes licencias los notarios de la Tesorería Real legitimaban la mercancía ilegal. Sin dichas licencias, cualquier mercancía ilegal estaba sujeta a secuestro por otras jurisdicciones municipales. Desempeñando este oficio el notario devino uno de los más poderosos funcionarios dentro de la burocracia colonial. Para poner fin a esta creciente influencia el Gobernador Hernandarias, en 1607, trató infructuosamente de procesar a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y de Real

Hacienda, bajo los cargos de haber introducido ilegalmente 198 esclavos.<sup>256</sup> A diferencia de los notarios de la Tesorería Real, los notarios capitulares no estaban relacionados con la inspección de los navíos entrantes pero sí con el registro cotidiano de las actividades del cabildo, incluyendo las decisiones judiciales emitidas por los alcaldes de segundo voto. Custodiando esos archivos o registros el notario capitular también devino uno de los más significativos funcionarios dentro del estado colonial. Para obstruir su rol crucial el Teniente Gobernador Mateo Leal de Ayala, con el apoyo del General Sebastián de Orduña y Juan de Tapia de Vargas, pusieron a Cristóbal Remón, el notario capitular, en prisión. Remón fue finalmente expulsado a la ciudad de Luanda, en Angola, para ese entonces colonia portuguesa, lugar donde más tarde falleció.

Finalmente, el Cabildo de Buenos Aires era una corporación con una serie diversificada de funciones y responsabilidades ejecutivas, deliberativas, judiciales y ceremoniales representando a los estamentos urbanos más altos y los intereses locales estrictamente clasificados de acuerdo a sus antecedentes y riqueza familiares. Su autonomía teórica era limitada por el omnipotente poder del gobernador, la Real Audiencia, y el Consejo de Indias. A través de las peticiones anuales registradas en los archivos notariales, los regidores mostraban otros medios utilizados para asegurar el cumplimiento de materias menos controversiales. Las más comunes peticiones solicitaban la condición de vecino, salarios y marcas de hacienda, o requerían licencias para exportar materias primas, importar esclavos, desempeñar oficios artesanales, poblar estancias, abrir pulperías, colocar mojones en establecimientos rurales, cazar y recolectar ganado salvaje, o hacer cueros, grasa y tasajo, todas las cuales constituían medios políticos que interferían en el ámbito económico.

Resumiendo, he verificado en este estudio como la naturaleza contradictoria del estado colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho estado, que se estructuraba a sí mismo en relación a los constreñimientos económicos, sociales y políticos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en relación subordinada al estado superior español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y el Consejo de Indias) y la red intérlope Portuguesa, e internamente en relación con la sociedad civil y política local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado; por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías y cofradías, y miembros del Cabildo Eclesiástico. La forma peculiar de estructurar su propia naturaleza contradictoria marco el antecedente histórico más importante y remoto de la revolución de independencia.

## **Epílogo Sección I-A**

Este trabajo ha demostrado que el orden imperial-absolutista adquirió en el Río de la Plata connotaciones muy peculiares y muy distintas de las que caracterizaron el resto del dominio español. Desde sus orígenes, dicho orden se caracterizó por ser el eslabón débil de la dominación absolutista en el mundo colonial al ser la puerta de entrada del pensamiento heterodoxo erasmiano y al contar con una desmedida impronta del capital comercial y con las consiguientes políticas mercantilistas, acompañadas por media docena de sub-ordenes, tales como el barroco, el estamental, el señorial, el patrimonial, el corporativo y el nepótico.

Teniendo en cuenta que Buenos Aires era solo un vínculo intermedio en el gran circuito mercantil que se extendía entre Sevilla, Loanda (Angola) y Potosí podemos concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en Buenos Aires en el siglo XVII a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado externo (contrabandistas de esclavos) y productores orientados al mercado interno, muchos de los cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos, cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto crónico para obtener hegemonía.

Hemos verificado también en este estudio como la naturaleza contradictoria del estado colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho estado, que se estructuraba a sí mismo en relación a los constreñimientos económicos, sociales y políticos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en relación subordinada al estado superior español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y el Consejo de Indias) y la red intérlope Portuguesa, e internamente en relación con la sociedad civil y política local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado; por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías y cofradías, y miembros del Cabildo Eclesiástico). La forma peculiar de estructurar su propia naturaleza contradictoria marco el antecedente histórico más importante y remoto del colapso del orden colonial-absolutista.

## **Sección I-B Configuración multicultural de un orden jerarquizado, estamental y esclavista**

Habiendo estudiado en la sección anterior la crisis del estado colonial, ahora nos proponemos analizar en esta segunda sección la configuración de un orden estamental y esclavista. En esta segunda sección, dedicada a investigar una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista, trato en cuatro capítulos consecutivos la intermediación de una minoría foránea y su impacto en una sociedad dividida, la gestación de un patriciado rural, la retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial, y la subalternización de los originarios como fuerza de trabajo colonial.

### **Capítulo I-B-4**

#### **Intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada.**

**15**

### **Índice**

- D-I Teoría del crisol de razas.
- D-II Naturaleza de la inmigración portuguesa.
- D-III Sociedad anfitriona.
- D-IV Miscegenación entre blancos e indios.
- D-V Presencia de los estamentos.
- D-VI Cualidad estamental de vecino.

- D-VII Criollos de la elite colonial.
- D-VIII Criollos plebeyos.
- D-IX Movilidad económica y social.
- D-X Aculturación de los migrantes extranjeros.
- D-XI Intermediarios de poder.

## **D-I La teoría del crisol de razas.**

Recientemente, algunos eruditos extranjeros se han involucrado en este viejo debate, argumentando que la teoría del crisol de razas no explica satisfactoriamente el amplio efecto de la inmigración extranjera. Mientras Samuel Baily ha sugerido que la categoría de pluralismo cultural es más apropiada que la teoría del crisol de razas, Mark D. Zuchman cree, en el caso de Córdoba del siglo XIX, que los frecuentes matrimonios entre extranjeros y criollos no liberó a la Argentina de tensiones étnicas y hostilidad hacia la amalgamación.<sup>257</sup> Siguiendo esta línea metodológica, aunque volcado al estudio de un período histórico regido por un orden imperial-absolutista, intentaré analizar en este artículo el impacto social de la inmigración, teniendo en cuenta no sólo los diferentes conceptos de raza, grupo étnico o nacionalidad, y los conceptos de integración, aculturación, asimilación, acomodamiento, diferenciación, discriminación y desintegración, sino también la hipótesis de que el logro de la elevada movilidad económica y social proveyó una fuerte razón para esperar una declinación en la identificación étnica o en la identificación territorial.<sup>258</sup>

## **D-II La naturaleza de la inmigración portuguesa.**

La discusión de la naturaleza de la inmigración portuguesa hacia Hispanoamérica a principios de siglo XVII, variará de acuerdo a que los consideremos una minoría étnica, nacional o religiosa; o deseando o no deseando integrarse a la sociedad anfitriona (en otras palabras, deseando o no deseando perpetuar la diferenciación étnica y cultural); o una minoría territorial dominante, intermediaria u opresiva; y finalmente si admitimos que gozaron de la oportunidad de desplazarse de una posición intermediaria a una posición dominante.

De acuerdo con las Leyes de Indias, a pesar del hecho que la dinastía Habsburga era entre 1580 y 1640 la que regía tanto a Portugal como España, los colonos de los imperios coloniales de España y Portugal retuvieron su propia identidad nacional y sus propias fronteras, a sus factorías coloniales les estaba formalmente prohibido comerciar entre sí. La mayoría de los colonos criollos veían a la elite Portuguesa como una raza extranjera que debía quedar separada de la mayoría criolla, mientras que los Portugueses plebeyos eran vistos como parte de las castas. Los estereotipos típicamente aplicados a los judíos por los antisemitas --ambiciosos, esforzados, taimados, clánicos, astutos, inteligentes-- fueron siempre aplicados a los comerciantes Portugueses.<sup>259</sup> En forma similar, los estereotipos aplicados a los esclavos africanos fueron también a menudo aplicados a los plebeyos Portugueses. Los marineros Portugueses que tripulaban los barcos que traficaban desde el África occidental al Brasil y el Río de la Plata eran predominantemente mulatos, y probablemente sanguíneamente relacionados con los Africanos vendedores de los esclavos que transportaban.<sup>260</sup>

Aunque los criollos podrían haber considerado a la afinidad religiosa como un vínculo unificador, de hecho veían a los portugueses como extranjeros, y estos visualizaban a los criollos como distintos. Los portugueses tendían a ser despectivos con los criollos, considerándolos débiles y letárgicos, hombres que "...no tienen deseo de arriesgar o aceptar peligros por tierra o mar para ganarse el sustento".<sup>261</sup> Esto no era para nada una actitud excepcional por parte de los Portugueses. Donde quiera que los Portugueses ejercieran el colonialismo, practicaban alguna discriminación racial.<sup>262</sup>

Como cualquier nacionalidad oprimida (los canadienses franceses en Canadá, los flamencos en Bélgica),<sup>263</sup> los portugueses en Buenos Aires se asemejaban a una minoría intermediaria, o a una minoría amortiguadora. A diferencia de las minorías oprimidas, sin embargo, las minorías intermediarias no estaban dirigidas a satisfacer demandas laborales. A juicio de Edna Bonacich, las minorías intermediarias se hallan "...en sociedades en donde hay una amplia brecha entre elites y masas, con el grupo minoritario sirviendo para llenar la brecha ...tanto externa como internamente".<sup>264</sup> Un papel similar fue jugado por los grupos mercantiles holandeses, británicos, y franceses en la Sevilla del siglo XVII.<sup>265</sup> La minoría portuguesa manejaba un negocio entre Europa y África occidental por un lado, y Veracruz, Cartagena, Lima y Buenos Aires, en el otro. Dentro del Río de la Plata, la minoría portuguesa elevaba el precio de las mercancías que pasaban por sus manos, y recibía un gran provecho de estas simples transacciones.

### **D-III La sociedad anfitriona.**

En contraste, sin embargo, a los hindúes en África oriental, o a los armenios en la Turquía otomana, retratados por Edna Bonacich, la minoría intermediaria portuguesa en el Buenos Aires del siglo XVII enfrentaba una sociedad anfitriona cuya elite estaba profundamente dividida entre grupos de intereses opuestos y de orígenes nacionales distintos (criollos y españoles). La presencia de esta minoría intermediaria influyó fuertemente en la relación entre la elite y las masas (indios y negros), así como entre aquellos dos grupos de elite. Al mismo tiempo, esta relación contradictoria dividía a los portugueses intermediarios en colonos y en residentes temporales o itinerantes. La mayoría se volvía colono, invirtiendo en tierra, casándose, e involucrándose en la política local. Con todo, una minoría continuaba comportándose como residente temporal, moviéndose de un pueblo a otro, y evitando cualquier tipo de establecimiento definitivo.

La aculturación es generalmente un prerequisite para la integración o asimilación.<sup>266</sup> Planteo usar este último término no como un concepto concerniente sólo a la "capacidad adaptativa" del grupo inmigrante, o a las "variables macro-ambientales de la sociedad anfitriona", como argumentó Bernard Wong,<sup>267</sup> sino como un concepto mucho más amplio incluyendo lo que Milton Gordon ha llamado asimilación estructural, o el ingreso a gran escala en asociaciones, fraternidades, e instituciones de la sociedad anfitriona, en un nivel de grupo primario.<sup>268</sup>

También pretendo utilizar el concepto de acomodamiento para referirme a la primera fase del proceso de asimilación. Samuel Baily utilizó este término para referirse a la fase en que "...los inmigrantes desarrollan el conocimiento, habilidad y organización que les permite funcionar efectivamente". A diferencia de Baily, quien medía el acomodamiento por cuan rápido y cuan fácilmente los inmigrantes eran capaces de encontrar hogar y empleo, planeo medirlo por cuan rápidamente los colonos portugueses fueron capaces de obtener la asimilación política, económica y marital.<sup>269</sup> Para el estudio

de la asimilación relativa o diferenciada (identidad étnica) del inmigrante individual, tomaré en consideración: la cantidad y calidad (identidades profesionales) de los colonos y los residentes temporarios; y las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales de la sociedad anfitriona.

La región de Buenos Aires (Río de la Plata) se diferenciaba de otras regiones hispanoamericanas densamente pobladas por indios, como Lima, Veracruz, Cartagena, Tucumán o Córdoba, en que en aquellas áreas los criollos eran blancos y se consideraban a sí mismos españoles; y los españoles o peninsulares, excepto en Tucumán y en Córdoba, monopolizaban el comercio exterior. En la región de Buenos Aires, sin embargo, los criollos eran, hacia el siglo XVII, una población mestiza que se consideraba a sí misma separada no sólo de los indios, sino también de los españoles o peninsulares y de los portugueses. En realidad, los criollos de Lima, Veracruz, y Córdoba se oponían fuertemente a que sus hijas se casaran con inmigrantes portugueses, un importante factor para que los mercaderes portugueses se mantuvieran como residentes temporarios en vez de volverse colonos. Por contraste, en Buenos Aires, la división entre españoles o peninsulares y criollos redujo la hostilidad y el prejuicio contra los portugueses.

#### **D-IV La miscegenación entre blancos e indios.**

En Buenos Aires, la miscegenación entre blancos e indios tenía casi un siglo de antigüedad (incluyendo la historia de Asunción del Paraguay, desde donde vinieron los fundadores de la ciudad de Buenos Aires). Dado que la heterodoxia religiosa fue estrictamente prohibida en la Hispanoamérica colonial, la región geográfica, el rango, y el estado económico eran en el Buenos Aires del siglo XVII los determinantes principales en la posesión de un cargo público, en la elección de un cónyuge, y en la adquisición de propiedad privada. Múltiples conflictos siguiendo las líneas geográficas se desarrollaron entre criollos, portugueses y españoles. Estos conflictos geográficos (nacionales o regionales), sin embargo, no impedían la formación de ciertas alianzas económicas. Los mercaderes portugueses, algunos españoles, y los criollos, se agruparon a menudo en Buenos Aires, en el siglo XVII, para defender las rutas comerciales atlánticas o marítimas contra otros españoles y criollos que anhelaban una producción orientada hacia el mercado interno.

#### **D-V La presencia de los estamentos.**

En contraste con las sociedades burguesas, las sociedades de un orden imperial-absolutista contaban para la estratificación social, sólo con la categoría del estamento, la cual no confería derecho alguno y sí sólo privilegios y obligaciones.<sup>270</sup> La presencia de los estamentos y de las formas de propiedad correspondientes, no permitieron emerger al elemento de clase como la única categoría. Indudablemente, el proceso de desarrollo histórico no prohibía la variabilidad dentro de cada estamento. Podía ser posible, entonces, discernir divisiones de clase; pero la identificación con un elemento particular (por ejemplo: la vecindad) era más importante que las formas específicas de dependencia en el interior de un estamento. La existencia de estamentos no coincide con la existencia de clases. Un grupo particular de individuos puede poseer un estatuto legal similar, pero pertenecer a estamentos sociales de características totalmente diferentes.<sup>271</sup>

El concepto de criollo, español o portugués se volvió marcadamente contradictorio en la sociedad de Buenos Aires del siglo XVII, al permitir identificar a un miembro del

vecindario (un tipo de elite) o a un no residente. A diferencia de los indios, esclavos y extranjeros itinerantes, algunos colonos y sus familias tenían asignados los títulos de estantes y vecinos (residentes). Aunque los vecinos gozaban del privilegio de adquirir bienes raíces y encomiendas de indígenas, así como del privilegio de volverse miembros del Cabildo y la Milicias, los estantes tenían sólo el privilegio de trabajar como minoristas, artesanos, soldados y jornaleros en chacras y estancias.<sup>272</sup>

#### **D-VI La cualidad estamental de vecino.**

La cualidad estamental de vecino también confería el privilegio de participar en las vaquerías (caza de ganado salvaje) y en la exportación de trigo y harina al Brasil. Los vecinos eran clasificados en una escala que abarcaba cinco grados de privilegios, prioridades o prelación. Además, la promoción de la categoría estamental de vecino hacia aquella categoría política de regidor (miembro del Cabildo) traía consigo crecientes oportunidades de obtener mercedes de tierra, encomiendas, licencias para vaquear, y permisos de exportación.<sup>273</sup> Los primeros colonizadores, que arribaron con el General Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires, en 1580, les fue asignado el título de primeros pobladores y gozaban de cuotas más altas de harina y tasajo para exportar. Los pobladores más recientes, apodados por este sistema de gradación como quintos pobladores, les eran otorgadas cuotas más bajas.<sup>274</sup>

La división entre la clase y rango dominante, y la clase y rango dominada, no coincidía en el Río de la Plata con las diferencias de nacionalidad o de clase social. Los criollos españoles o los portugueses no constituían grupos separados y homogéneos; el gobierno colonial estaba fuertemente dividido por una línea estamental más que por una línea de clase o de diferenciación nacional. Así como los comerciantes mayoristas y los funcionarios públicos, criollos, españoles o portugueses, formaban parte del estamento dominante, los artesanos, pulperos y mercachifles, españoles, criollos o portugueses, formaban parte del rango dominado. Causando una nueva fragmentación del rango dominante, la penetración del capital comercial perturbaba y confundía al antiguo sistema de clase y estamento (encomendero), construido parcialmente sobre los linajes y privilegios, sobre las distinciones estamentales, jerárquicas y hereditarias.

Aunque las elites criollas se distinguían de los pobladores de elite Portugueses que entonces controlaban el comercio exterior de Buenos Aires, no todos ellos descendían de conquistadores y primeros pobladores. Como es bien sabido, la mayoría de los primeros 64 pobladores fundadores de Buenos Aires fueron criollos nacidos en Asunción. Entre 1580 y 1582, sin embargo, 21 de los fundadores (o el 33%) volvieron a Asunción; y veinte años más tarde, en 1602, solo siete de los fundadores criollos originarios permanecieron en Buenos Aires.<sup>275</sup> La inmigración española y portuguesa comenzó a llenar la brecha dejada por esta emigración. Un miembro de la elite criolla puede entonces fácilmente ser cualquier hijo o hija de una mujer criolla y de un comerciante Portugués. Debido a la escasez de mujeres Portuguesas, mucho más intercambio sexual debe haber tomado lugar entre varones Portugueses y mujeres criollas que entre varones Peninsulares y mujeres criollas. Aquellos varones Portugueses que se mezclaban con negras, mulatas, o indias pertenecían obviamente a un estamento plebeyo.

Aparte de distinguirse de los portugueses, los criollos de la elite también se distinguían de los españoles de la elite (los blancos), quienes entonces controlaban la burocracia de Buenos Aires y procedían de diferentes provincias o regiones españolas.

Pero, a diferencia de Potosí, donde los criollos de la elite identificaban a los españoles como castellanos, vascos, andaluces, gallegos, catalanes o andaluces, en Buenos Aires, el estado étnico regional entre españoles no tuvo vida o fuerza alguna fuera del grupo español.

#### **D-VII Los criollos de la elite colonial.**

Aunque inferiores en poder a los españoles peninsulares, los criollos de la elite estaban estrechamente conectados entre ellos, y con frecuencia jugaban el papel de sus auxiliares, sirviendo en las filas de la iglesia y el ejército, dirigiendo sus propiedades rurales, y actuando como mediadores o "intermediarios del poder" (por ejemplo: pulperos, sacerdotes y capataces) entre españoles e indios.<sup>276</sup> Una brecha en el sistema de poder existía por un lado tanto entre los niveles blanco e indio como por otro lado entre los españoles y criollos, y las minorías intermediarias como las portuguesas. Cuanto más amplia era esta brecha, más grande era la necesidad de "intermediarios del poder".<sup>277</sup>

Como resultado de las reformas tridentinas y las influencias erasmianas y del creciente número de criollos en la iglesia del Río de la Plata, la burocracia eclesiástica estaba en sus filas mucho más abierta con respecto a la existencia de los "intermediarios del poder", que lo que estaba el resto de la burocracia colonial.<sup>278</sup> Había amplias oportunidades para los criollos de la elite para ejercer presión política dentro del cabildo Eclesiástico. Todos los miembros más encumbrados de este cuerpo, durante este periodo, incluyendo el diacono, el archidiacono, y los canónigos, eran criollos de origen Paraguayo. Tan grande era esta oportunidad y la disponibilidad de presbíteros criollos que en 1617 el Gobernador Hernandarias escribió al Rey pidiéndole que ahorrara el gasto de mandar presbíteros por cuanto había muchos presbíteros criollos (la mayoría de ellos mestizos) disponibles.<sup>279</sup> Es comprensible entonces, porque el Cabildo Eclesiástico estaba cerradamente asociado con los productores orientados hacia el mercado interno, que eran predominantemente criollos. Estos intereses económicos y sociales continuamente desafiaron al Obispo en Buenos Aires, quien estaba abiertamente conectado con los comerciantes orientados hacia el mercado externo.

Los criollos de la elite también estaban agrupados con los españoles en lo que respecta a los castigos, como muestra la costumbre de discriminar la forma de castigo asignada a los criollos y los indios. Por ejemplo, cuando en 1631, Pedro Cajal, un Chileno criollo, hijo natural de Juan Cajal, Oidor de la Real Audiencia de Chile, y el indio sastre Juan Puma fueron hallados culpables de robar la Tesorería Real de Buenos Aires, Cajal fue sentenciado al degüello, y Puma a la horca.<sup>280</sup>

#### **D-VIII Los criollos plebeyos.**

Por otra parte, los criollos plebeyos, aunque más elevados estamentalmente que los negros y los indios, estaban estrechamente conectados a ellos. Los criollos plebeyos a menudo tenían trabajos similares a aquellos de los negros libertos o indios, y vivían junto con ellos en concubinato. La falta de censos detallados nos impide llegar a cualquier firme estimación cuantitativa de su número. No obstante, la información esporádica sobre la historia social de la campaña provee algunas claves para entender su composición étnica. Tan temprano como octubre de 1585, el Tesorero de Buenos Aires, Hernando de Montalvo, reveló la existencia en la campaña de un vasto número de mozos mal-entretenidos (vagos), que no eran ni blancos ni indios ni negros, y que asolaban chacras y

estancias.<sup>281</sup> Los registros del Cabildo también revelan el uso del contradictorio término de **mestizo** para caracterizar a un plebeyo criollo. En un caso que asomo en 1669, una prostituta que fue expulsada a Santa Fe fue caracterizada como mujer mestiza de **mal vivir**.<sup>282</sup>

El concepto de mestizo se volvió extremadamente contradictorio en la sociedad de Buenos Aires del siglo XVII. Podía identificar tanto a un miembro de la elite criolla como a un criollo plebeyo. En un caso que aconteció en la década de 1660, cuando el mestizo Domingo González Cabezas (hijo natural de Simón González de Acosta y la mestiza Catalina Cabezas) devino administrador de la encomienda de indios Tubichaminí y de una veintena de indios Serranos del pago de la Magdalena (que habían pertenecido previamente a Catalina Guerrero, hija de Alonso Guerrero de Ayala), el termino fue usado en el primer sentido.<sup>283</sup>

## **D-IX La movilidad económica y social.**

La existencia de una diferenciación social dentro de la población portuguesa residente en Buenos Aires no significa que no existió absolutamente ninguna movilidad social entre ellos. La antigua división española de la sociedad estamental en forma de rangos, estáticos en principio, era lo suficientemente elástica en las economías de los centros comerciales coloniales como para proveer oportunidades para elevarse de los rangos sociales más bajos hacia posiciones de alto status social. Porque la movilidad económica y social ascendente era posible, aún los portugueses plebeyos de la ciudad a principios del siglo XVII, tenían un poderoso incentivo para asimilar o, en otras palabras, para experimentar un fuerte descenso en la identificación étnica. Considerando que la conciencia étnica se amortigua en la medida en que los miembros de los grupos étnicos alcanzan un más alto status social, de acuerdo con Cohen (1977), una clase social más alta y algunas formas de identificación étnica eran incompatibles.<sup>284</sup> Es sabido que, en el período de rápida penetración del capital comercial, algunos portugueses plebeyos fueron capaces de acumular capital comenzando con sus negocios al por menor o sus artesanías. Por ejemplo, Antonio de Pino, que empezó como herrero, también devino un terrateniente; Alfonso Caraballo, que comenzó como carpintero, también devino un terrateniente y el socio marital de una mujer perteneciente a la elite criolla; y Cristóbal de Torres, que comenzó como zapatero y pulpero, finalizó como terrateniente y candidato a un puesto capitular.<sup>285</sup> Cuando quiera que las condiciones económicas no estaban dadas y la posibilidad de acumular capital era muy estrecha, sin embargo, el proceso diferenciador entre los Portugueses plebeyos y los Peninsulares se fortaleció. En este caso, los plebeyos Portugueses y Españoles, recurrían a intermediarios mercantiles o no se quedaban por mucho tiempo en Buenos Aires. Tan pronto como podían se marchaban al Alto Perú o a Chile, donde las ganancias eran más altas. De aquí que, en periodos de crisis, la intermediación y la movilidad geográfica reemplazaba la movilidad social.<sup>286</sup> Finalmente, los Portugueses y los españoles plebeyos gozaban de una mayor oportunidad de ascender la escala social que la que gozaban los criollos plebeyos. Estos últimos rara vez cambiaban de status, y raramente se mudaban de su localidad nativa.

Mientras que los portugueses plebeyos ascendían en la escala social en forma individual, apenas si existía competencia y prejuicio social. Pero cuando los mercaderes portugueses ascendieron como grupo en la escala social, se entró a experimentar un incremento de la competencia social, y por lo tanto, del prejuicio social, como una reacción defensiva para preservar el orden social más antiguo. Los portugueses de la elite fueron

vistos crecientemente como una raza, y aún a veces, como una herejía, más que como una nacionalidad.

Como Buenos Aires resultó incorporada al comercio mundial en los primeros cuarenta años del siglo XVII, cambiaron las discriminaciones en los privilegios burocráticos, basadas en los orígenes geográficos (nacionales o regionales). En el grupo mayoritario, como el formado en Buenos Aires a principios del siglo XVII por españoles y criollos de la elite (beneméritos), sus miembros mantenían puntos de vista opuestos con respecto al tratamiento de los migrantes portugueses.

Aunque en 1580 Felipe II se convirtió en el gobernante de dos imperios (España y Portugal), las Cortes de Tomar (1581) establecieron que los dos reinos debían mantenerse separados. No obstante, la prohibición mercantil entre sus factorías coloniales (Buenos Aires con Bahía en Sudamérica, y Macao con Manila en el Sudeste asiático) se entró a relajar cuando los Holandeses amenazaron durante la Guerra de los Treinta Años (1618-48) la seguridad de ambos imperios.<sup>287</sup> Tal fue el perjuicio económico ocasionado a los intereses colonialistas portugueses por esta guerra, que estos últimos decidieron en 1640 emanciparse de la metrópoli española. En represalia, la corona española expulsó de sus dominios a todos los comerciantes lusitanos.

Los Beneméritos, productores orientados hacia el mercado interno, creían que la identidad criolla debía ser reforzada mediante una política discriminatoria contra los inmigrantes, tales como los Portugueses, privándolos de aculturarse y de asimilarse, y desalentando a las elites criollas de casar a sus hijas con foráneos. Este punto de vista era abiertamente apoyado por Hernandarias, el primer Gobernador criollo de la Provincia del Río de la Plata, que tenía asiento en Asunción, así como por toda la facción Benemerita, ayudando así a polarizar la estructura social y política de Buenos Aires en dos claras facciones o estamentos.

Para seguir una fructífera política discriminatoria contra los Portugueses gobernados por la Contra-reforma Habsburga, la facción Benemerita (formada por miembros de la elite criolla y peninsular) tenía que recurrir a muy sutiles argumentos religiosos.. En 1619, el Capitán Manuel de Frías, cónsul general del Río de la Plata, un fuerte adherente de los Jesuitas, y un representante de los productores orientados hacia el mercado interno, propusieron a la corona española un extenso memorandum rogando para que se inaugurara una oficina Inquisitorial en Buenos Aires, con el propósito de detener las numerosas arribadas de "nuevos cristianos Portugueses, anteriormente judíos", que amenazaban la pureza de la religión y constituían un monopolio económico, por cuanto "...muchos de ellos eran ricos y poderosos y muy conocedores sobre toda clase de mercancías y esclavos".<sup>288</sup> En contraste con la Inquisición Mexicana o Peruana, sin embargo, la Inquisición en Buenos Aires no encarceló a ningún judío.<sup>289</sup> A pesar del éxito que obtuvo el Cap. Frías para establecer una oficina inquisitorial, las oportunidades para los Portugueses Conversos (Cristianos Nuevos) de participar en el mercado español se incrementaron con la muerte de Felipe III en 1621, y con la elevación al poder del Conde Duque de Olivares, quien buscó recurrir a todo tipo de medios comerciales para sacar al Imperio Español de su crisis. De acuerdo con Caro Baroja, "asientos, rentas y licencias comerciales eran otorgadas a un gran número de conversos Portugueses, con la expectativa que la economía general se fortaleciera".<sup>290</sup>

De acuerdo con la información brindada por Besio Moreno, el número de pobladores Portugueses en 1643 alcanzó a 108 cabezas de familia, o un total de 370 individuos de origen Portugués, mientras que el número total de habitantes en Buenos Aires era de sólo dos mil.<sup>291</sup> Pero si tenemos en cuenta la información brindada por Lafuente Machain, entonces el número de varones Portugueses en 1643 fue levemente más alto, alcanzando la cifra de 144 individuos. De acuerdo con Lafuente, el número total de Portugueses que arribaban a Buenos Aires era de 209 hombres. De este último número debemos deducir a 45 que eran transeúntes y no permanecieron en el área, a 11 que no podían ser considerados residentes porque permanecieron solteros, a 7 que arribaron después de 1643, y 2 que se fueron para el Alto Perú antes de 1643. Si analizamos el número de Portugueses que entraron a Buenos Aires, encontramos que en 1643, de acuerdo con Besio Moreno, 95 de las 108 cabezas de familia de Portugueses inmigrantes, o el 88%, se habían establecido definitivamente. Por otro lado, si tomamos las cifras brindadas por Lafuente Machain, entonces el porcentaje disminuía al 69%, o 144 sobre 209 hombres.<sup>292</sup>

#### **D-X La aculturación de los migrantes extranjeros.**

La evidencia sobre la aculturación de los migrantes extranjeros aparece al menos conflictiva.<sup>293</sup> Los migrantes extranjeros, como los portugueses, estaban forzados a hacer de la mayoría dominante (criollos y españoles) su grupo de referencia para la adopción del lenguaje, la moneda, la dieta, los pesos y medidas, la indumentaria, los objetos de culto religioso, y los patrones de ocio, ley y costumbres morales.

La evidencia de la integración (goce de privilegios iguales) de colonos portugueses también aparece conflictiva. Por un lado están los ejemplos de los colonos portugueses de la elite quienes, deseando la integración en la sociedad dominante, aprendieron español, adoptaron la vecindad de Buenos Aires, fueron activos en la escena política de Buenos Aires, se casaron con mujeres criollas, y hasta tuvieron hijos que más tarde entraron en órdenes religiosas españolas.<sup>294</sup> Los pobladores Portugueses pueden haber quedado enteramente leales a su minoría grupal, pero estaban, al mismo tiempo, a diferencia de los Portugueses itinerantes, bajo la necesidad de relacionarse con los valores y las expectativas de los criollos y peninsulares de la elite.<sup>295</sup> En el caso de los pobladores Portugueses, como Gil Gonsález de Moura, Pedro Home Pessoa de Saa, y Amador Váez de Alpoin, los valores y las expectativas criollas fueron alcanzados. Estos pobladores Portugueses se casaron con mujeres criollas, invirtieron en propiedades urbanas y rurales, y participaron en expediciones militares contra los indios hostiles, la principal tarea requerida por el establishment criollo para adquirir status de poblador.<sup>296</sup> Como símbolo del ajuste a una sociedad colonial que experimentaba un proceso de incorporación al comercio mundial, la propiedad solariega aparentaba ser un indicador apropiado. De aquí que, las casas eran usualmente adquiridas por individuos que poseían un fuerte compromiso para poblar Buenos Aires. Los migrantes procedentes de Europa tendían a evitar este compromiso hasta que estaban determinados que Buenos Aires ofrecía ventajas reales sobre sus previas áreas de residencia.

Por otra parte, existe evidencia de una minoría portuguesa plebeya e itinerante (mercachifles, pulperos, mercaderes menores y sastres) que nunca se establecieron permanentemente en la ciudad anfitriona, generalmente alquilaban sus moradas, no se casaban con criollas de la elite, estaban periódicamente segregados de la sociedad porteña, y hasta retornaban a Brasil o a Portugal a causa de la persecución étnica y religiosa.<sup>297</sup>

Con todo, uno puede llegar a la conclusión acerca de la general noción de acomodamiento sugerido por Bailly (1983) midiendo cuan rápidamente y con cuanta frecuencia los colonos portugueses fueron capaces de obtener la vecindad, ser admitidos como funcionarios públicos, artesanos o pulperos, ser empleados en el comercio, y/o estar casados con mujer criolla. La concesión de permisos para entrar a la ciudad (licencias de inmigración) y practicar profesiones liberales y artesanías se volvió un claro instrumento para la asimilación cultural. Cuando Buenos Aires encaraba amenazas de invasión militar, el Cabildo reaccionaba emitiendo más licencias de inmigración que las usuales para enviar la inmigración Portuguesa al interior, fuera del alcance de potenciales invasores Holandeses. Cuando los Holandeses amenazaron con invasiones militares en 1616, 1633, y 1637, trece, doce y treinta y tres licencias, respectivamente, fueron otorgadas a los Portugueses.<sup>298</sup> Para emitir licencias de inmigración, las autoridades coloniales siempre requerían de los beneficiarios el otorgamiento de fianzas. Este procedimiento burocrático implicaba una suerte de relación de compadrazgo. Los fiadores o padrinos eran en un sentido cultural como puentes entre la sociedad criolla de Buenos Aires y los Portugueses recién llegados. Para lidiar con sus patrones criollos o peninsulares, los Portugueses debían familiarizarse con las costumbres y las instituciones sociales de la sociedad de Buenos Aires. Los comerciantes criollos y peninsulares a menudo proveían de fianzas a favor de los Portugueses que arribaban. En la Tabla I publicada por este autor en el *Hispanic American Historical Review*, se provee una lista de 64 Portugueses recién llegados que fueron detenidos, así como de los nombres de aquellos que libraron fianzas (de \$300 pesos cada una) para su libertad.<sup>299</sup> En forma similar, los pasajeros foráneos inmigrantes estaban obligados a encontrar fiadores, muchos de los cuales depositaban fianzas para mas de una persona. Por ejemplo, Dionisio Fernández y Lucas Medrano, un notario, cada uno de ellos depositó pagos en efectivo o fianzas para cinco diferentes pasajeros.<sup>300</sup> Finalmente, los inmigrantes foráneos no podían a veces procurarse de fiadores. En estos casos, tenían que depositar algo como garantía o encarar una estadía en la cárcel.<sup>301</sup> Por ejemplo, Bartolomé Beloso, un propietario de navíos, tuvo que depositar como garantía dos esclavos, Domingo y Francisco, ambos de la Costa de Guinea.<sup>302</sup>

## **D-XI            Los intermediarios de poder.**

La gente que actuaba como "puente" no era mero "intermediario cultural" sino también "intermediarios de poder", ejerciendo el mismo en dos diferentes niveles (las comunidades locales y las extranjeras) y "derivando su poder en un nivel por su éxito en otro nivel".<sup>303</sup> La intermediación fue hecha posible por una "discontinuidad en el poder y en los sistemas de comunicación de los segmentos de la mayoría y la minoría y por la posibilidad de distribuciones de recursos por un intermediario".<sup>304</sup> De 48 intermediarios, solo siete, o el 15%, detentaban posiciones políticas. El más famoso y más eficiente intermediario con tal posición fue Juan de Vergara, el intelectual orgánico de la facción Confederada. Al proseguir una política integrativa, los Confederados, comerciantes orientados hacia el mercado externo, confiaban en aliados que no podían alardear de ancestros que habían sido señores de indios y tierras, y favorecían la asimilación de las minorías foráneas, tales como la de los Portugueses, al fomentar a las minorías para que demandaran privilegios políticos y económicos, alcanzando así un importante aliado en su larga lucha contra la facción Benemérita. Por ejemplo, Vergara era capaz de obtener el apoyo para Juan Cardoso Pardo. En marzo 1619, Cardoso Pardo, un maestro de escuela que también había sido un valet del Teniente-Gobernador Francés de Beaumont y Navarra,

y de Juan de Vergara, su candidatura como Defensor de la Real Hacienda fue drásticamente desafiada por el Alguacil Mayor Francisco González Pacheco.<sup>305</sup> De igual manera, en 1623, el candidato de Manuel Cabral para el Cabildo fue desafiado por el Regidor Diego de Trigueros sobre bases similares. De nuevo, Juan de Vergara, quebrando la política Confederada de no invocar alcurnia para ganar un puesto, alabó la contribución del padre de Cabral, Amador Váez de Alpoin, a la ciudad de Buenos Aires, logrando ganar la opinión de los cabildantes en su favor.<sup>306</sup> También hizo lo que pudo en 1624 para defender a Cristóbal de Torres, un candidato para un puesto capitular, contra las objeciones fundadas en el hecho de que Torres había sido un zapatero y un pulpero.<sup>307</sup> En una versión muy similar, cuando la facción Confederada gobernaba el Cabildo, trataba de proteger a los pobladores Portugueses contra cualquier amenaza Benemérita. Cuando Simón Madera, un Portugués, sufrió la destrucción de su chacra, porque el Cap. Pedro Gutiérrez, un criollo Benemérito, dejó su caballo y ganado pastorear libremente, el Cabildo decidió aceptar la astronómica cifra de mil pesos como compensación por la ofensa.<sup>308</sup> La facción más fuerte, en este caso particular, la facción Confederada, era la única capaz de maximizar su poder de negociación, gracias al haber impuesto standards morales, ideológicos y políticos más altos. Por el contrario, los criollos eran mucho menos exitosos en tratar de proteger sus intereses. En 1618, un tiempo en que cuando los intereses de la facción Confederada controlaban el Cabildo, Bernardo de León, el Depositario General, que favorecía la facción Benemérita, desafió la elección al Cabildo del peninsular Francisco Muñóz, sobre la base de la necesidad de tener uno de los alcaldes y la mitad de los regidores ocupados por criollos. La propuesta no logró ganar el apoyo oficial porque muchos criollos eran Beneméritos.<sup>309</sup>

Además, mientras los pulperos eran los principales intermediarios entre las masas y la elite, los barberos y los sastres eran los principales intermediarios dentro de la elite. Los mayordomos, los capataces y los maestros artesanos recurrían a los pulperos y a los barberos cada vez que tenían que resolver un conflicto. Los pulperos, la mayoría de ellos de origen portugués, que trabajaban en Buenos Aires, podían hablar con una diversidad de vecinos mientras administraban sus almacenes. Porque estaban siempre en un lugar, mucha gente, incluyendo los conductores de carretas, podían divulgar chismes, ponerse al día en las últimas noticias, y pedirles transmitir mensajes. Se volvían así, como los propietarios de cafés de Jeremy Boissevain, en "lazos claves en la red de información" del Buenos Aires colonial.<sup>310</sup> Por la misma razón, algunos residentes de Buenos Aires se encontraban en las pulperías para ponerse al día con las últimas noticias. Además, los conductores de carros, los arrieros, los fleteros de ganado, y los mercachifles itinerantes eran los principales intermediarios entre lugares geográficos diferentes. Los conductores de carros estaban preparados para recibir, re-codificar y transmitir el mensaje o el chisme a lo largo de una senda seleccionada de sus propias redes.

La asimilación económica de los inmigrantes Portugueses en la primera mitad del siglo XVII puede ser observada también analizando el comportamiento de una muestra del Censo de 1643, el único existente para ese período.<sup>311</sup> Esta muestra, ilustrada en la Tabla II, publicada por el autor en el *Hispanic American Historical Review*, comprende 20 comerciantes Portugueses.<sup>312</sup> Algunos aspectos de esta Tabla necesitan elucidación. Primero, pareciera que el tiempo promedio que un comerciante necesitaba para incorporarse a la actividad mercantil fluctuaba (de acuerdo a la Columna A) en alrededor de seis años. Esto sugiere que no era tan sencillo entrar al comercio. Esta claro que en la presencia de un comercio ilegal altamente organizado, la incorporación en él requería un detallado conocimiento de la burocracia estatal, conocimiento que requería tiempo para ser

adquirido. Como es bien sabido, la existencia de un comercio ilegal requería de un aparato burocrático corrupto. Segundo, la columna B muestra que el promedio de tiempo en el cual los comerciantes registraban alguna actividad notarial fluctuaba alrededor de nueve años y medio. Finalmente, podemos notar que los comerciantes que registraban un gran número de años entre la última transacción y el Censo de 1643 eran, de acuerdo a la columna E, aquellos con pesadas inversiones en chacras y ganado. Esto explicaría porque renunciaron a sus actividades mercantiles tan temprano.

Finalmente, el otorgamiento de licencias matrimoniales era el principal mecanismo para cambiar el proceso de integración de simple aculturación a asimilación real. A diferencia de Richard M. Bernard, que usaba el término asimilación marital para referirse al "inter-matrimonio" como el origen de una sociedad de "crisol de razas", planteo usar el primer término no sólo como un concepto concerniente al desarrollo de nuevos grupos familiares mezclados, sino también, como sugiriera Milton Gordon, como un subproducto de la asimilación estructural.<sup>313</sup> Más aún, el argumento aquí es que, a diferencia de factorías internas, tales como Tucumán y Charcas, donde la movilidad social ascendente estaba inextricablemente ligada al matrimonio con extranjeros, en factorías como Buenos Aires, poblada por migrantes foráneos, la movilidad social ascendente estaba muy a menudo asignada al matrimonio con descendientes de conquistadores españoles. Esto es así aun hoy mismo. Debido a la legislación española, sin embargo, a los extranjeros en la América española no les estaba permitido casar con mujeres criollas. Pero, como un resultado indirecto de la incorporación de Buenos Aires en el comercio mundial, a los Portugueses finalmente se les permitió casarse con mujeres criollas. En 1606, el Obispo Cristóbal de Loyola disintió con el Gobernador Hernandarias sobre la interpretación de la Real Orden de 1602. Loyola consideraba que la expulsión de los Portugueses era negativa para la ciudad.<sup>314</sup> De manera que Loyola persuadió a Hernandarias de la necesidad de revocar esta Real Orden. Esto fue posible debido a la intensa competición política entre los dos intereses económicos en pugna.

Luego que esta controversia fuera ganada por Loyola, los gobernadores y los cabildos de igual manera comenzaron a permitir el cruce matrimonial de mujeres criollas con inmigrantes Portugueses. En contraste con Cartagena, donde los criollos tenían fuertes prejuicios contra los Portugueses (solo 32 de 184 Portugueses, o el 17%, casaron con mujeres criollas), en Buenos Aires los comerciantes Portugueses alcanzaron una asimilación marital mucho más alta.<sup>315</sup> La ausencia de mujeres Portuguesas contrarrestada por el abrumador número de mujeres criollas, obviamente contribuyó a la creciente exogamia. Aunque el índice de exogamia para los criollos era también alto, las razones para este particular incremento eran diferentes. Un número considerable de criollos, especialmente mujeres, se casaban con extranjeros.

Antes de la rebelión Portuguesa de 1640, una de las secuelas de la Guerra de los Treinta Años (1618-48), el porcentaje de mujeres criollas que se casaban con criollos era más bajo que el de varones criollos que se casaban con criollas. De 500 cabezas de hogar criollas estimadas por Besio Moreno para 1628, 413 residentes criollos, o el 83%, eligieron esposos criollos para sus hijas.<sup>316</sup> Un patrón inverso se dio entre los Portugueses. El porcentaje de mujeres Portuguesas que se casó con Portugueses era más alto que el de los varones Portugueses que casaban con Portuguesas. Diecinueve sobre un centenar de varones Portugueses consistentemente eligieron esposas Portuguesas. Si revisamos el origen étnico y geográfico de las mujeres seleccionadas como esposas por los pobladores Portugueses en el Buenos Aires del siglo XVII, concluimos que mientras mas de la mitad

de aquellos 145 pobladores Portugueses registrados en la lista de Lafuente Machain experimentaron una asimilación marital desposando mujeres criollas, hijas de Peninsulares, o descendientes de conquistadores, y solo una minoría desposó mujeres Portuguesas.<sup>317</sup>

A diferencia de los residentes pertenecientes a la elite Portuguesa, quienes, gracias a comunes valores sociales, gozaban de la posibilidad de alcanzar una rápida asimilación marital con la elite criolla, los Portugueses plebeyos eran automáticamente excluidos de ella. La asimilación marital de pobladores Portugueses plebeyos ocurría solo a través de mujeres negras, mulatas o indias. Sólo cuatro pobladores Portugueses, o el 3%, estaban en esta categoría. De aquí que, podamos concluir que 110 Portugueses varones de un total de 145, o el 76%, experimentaron una asimilación marital matrimoniando mujeres criollas de la elite.<sup>318</sup>

Aparte del rol desempeñado por la etnicidad en la discriminación de los matrimonios, la política jugaba un muy importante rol en reducir la heterogamia. Los candidatos matrimoniales Beneméritos se casaban exclusivamente con mujeres de su grupo. Como los Beneméritos favorecían un alto grado de conciencia parental y de descendencia señorial o de linaje, fomentaban los matrimonios cruzados entre primos y primos paralelos. Por ejemplo, Gonzalo de Carvajal, un cabildante Benemérito, casó con la hija de Francisco de Salas Videla, otro líder Benemérito de alto prestigio. De igual manera, Cristóbal Remón, otro importante líder Benemérito, casó con la hija de Cristóbal Naharro, uno de los primeros Beneméritos. En forma semejante, como los candidatos varones Confederados se encontraban imposibilitados de cortejar a las hijas de los Beneméritos, terminaban por casarse exclusivamente con mujeres de familias Confederadas. Juan Cardoso Prado, un controvertido maestro de escuela Portugués, casó con la hija de Hernán Suárez Maldonado, un famoso Confederado. Los Capitanes Francisco Pérez de Burgos y Alonso Guerrero de Ayala, ambos Confederados, casaron con las hijas de Mateo Leal de Ayala, el hombre que orquestó la mayoría de las transacciones ilegales. Finalmente, Francisco de Manzanares, otro militante Confederado, casó con la hija de Francisco Pérez de Burgos, y el General Sebastián de Orduña con la hija de Francisco Manzanares.<sup>319</sup>

Los matrimonios de vecinos Portugueses con mujeres españolas o criollas estaban arreglados por medio de la institución socio-económica del arras, una suerte de dote, que implicaba solo un décimo de los activos del novio. Muchos de estos Portugueses eran comerciantes que huían de la persecución de la Inquisición, que había sido instalada en Oporto y Bahía durante la década de 1620 para erradicar los elementos heréticos. De acuerdo a una muestra de trece casos, el valor de las arras se incrementó en ese tiempo a un 30% del valor de las dotes. Obviamente, el hecho de que las familias criollas eran económicamente modestas, y las Portuguesas muy ricas, hacía que la contribución marital de estos últimos fuera mayor que la de aquellos. Sin embargo, existían familias criollas, que desaprobaban la idea de mejorar su status económico matrimoniando sus hijas con extranjeros prósperos, y trataban de contrabalancear la situación casándolas con compañeros criollos.

Por otro lado, cuando Buenos Aires fue aislada del comercio mundial, a partir de la independencia de Portugal de España en 1640, era difícil para un poblador criollo, miembro de la elite, encontrar maridos extranjeros ricos para sus hijas. Los padres criollos abandonaban sus prejuicios étnicos y nacionales, y consentían en algunos pocos casos casar sus hijas con mulatos excepcionales.<sup>320</sup>

A pesar de la intensa asimilación que tuvo lugar a comienzos del siglo XVII, los prejuicios y sentimientos xenofóbicos se preservaron vivos en la elite dominante de Buenos Aires. Por ejemplo, hubo casos excepcionales de mujeres jóvenes que fueron contra la voluntad de sus padres (constituyendo un severo quiebre de las costumbres) rehusándose a casarse con varones Portugueses y eligiendo en cambio, criollos. En un caso, en 1633, Ana Hernández y Rojas, hija de Juan Martín de Amorín y Magdalena Hernández de Rojas, recurrió a un tribunal eclesiástico para oponerse a su padre, quien deseaba casarla con Francisco Álvarez, un rico comerciante Portugués, contra su voluntad. En su lugar, eligió casarse con Francisco Ramos Cabral, un criollo de origen Portugués y Paraguayo, hijo de Sebastián Ramos, un Portugués, y de Gerónima Méndez, una criolla descendiente de conquistadores. Francisco Ramos, a pesar de su origen Portugués, era un pobre vecino feudatario (en términos políticos un Benemérito).<sup>321</sup> En este caso en particular, la población se dividió entre aquellos que eran Portugueses, que tomaron partido por el padre de Ana, y aquellos que eran criollos, que tomaron partido por Ana Hernández. Aunque el sumario sobreviviente del registro eclesiástico no nos revela la decisión de la iglesia, de acuerdo con el testamento de Ana Hernández, ella finalmente se casó con su amante criollo, Ramos Cabral, y no con el Portugués Álvarez.<sup>322</sup> Esto sugiere que los prejuicios acerca de la antigüedad y el señorío algunas veces superan los intereses económicos. Pero cuán dividida estuvo la sociedad anfitriona? Simplemente perpetuó el cisma entre criollos y españoles, o sus miembros celebraron nuevas alianzas para reforzar su posición social inestable? Los casos que comprendían severos conflictos entre comerciantes criollos y españoles y entre Beneméritos y Confederados asomaron en el mismo comienzo de la historia del Río de la Plata.

Para resumir, concluyo a partir de la evidencia incorporada en este capítulo que, a diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de Buenos Aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de tierras, se casaron con mujeres criollas locales y se involucraron en la política local. Además, a diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes portugueses en Buenos Aires no experimentaron ningún tipo de persecución religiosa. Dada esta movilidad económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa en Buenos Aires en el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una posición intermediaria a una dominante, así como por qué han evitado siempre una estrategia de diferenciación nacional.

## Capítulo I-B-5

### **Gestación de un patriciado rural y rol del comercio y la inmigración**

#### Índice

- E-I Articulación de una batería de recursos
- E-II Estrategias de desarrollo rural
- E-III Emergencia de una producción agraria de gran escala
- E-IV Clanes familiares ligados a la encomienda
- E-V Producción de ganado en gran escala

## E-VI Monopolio de la oferta de carne

### E-I Articulación de una batería de recursos

El impacto de la penetración comercial en la colonización rural de Buenos Aires colonial es analizado mostrando como los empresarios no-encomenderos, a diferencia de los vecinos encomenderos, recurrían a comienzos del siglo XVII al trabajo asalariado y al trabajo esclavo, a la tierra pública y privada, al crédito mercantil, a las inversiones intensivas en capital, al monopolio sobre la oferta de carne al mercado interno y la contratación de compañías agrícolas con el fin de expandir sus negocios. Más aún, el acceso al excedente de tierra por el cual los empresarios no-encomenderos articulaban los alrededores de Buenos Aires estaba estrechamente ligado a la división del trabajo y a la existente lucha intra-colonial. En Buenos Aires, las contradicciones existieron dentro de diferentes sectores o facciones de grupo de interés o estamentos que tuvieron una posición dominante desde las postrimerías del siglo XVI. Estas contradicciones llevaron a sucesivos cambios en el control de la mano de obra y el aparato del estado.

Sin embargo, estos cambios no generaron un trabajo asalariado real, como lo pretendía el reformismo socio-agrario erasmiano (Escuela de Alcalá y Pedro de Valencia), por cuanto la organización socio-económica y la estructura legal colonial, fueron concebidas solo para producir un crecimiento comercial y para evitar cualquier tipo de desarrollo capitalista real.<sup>323</sup> De aquí que, la des-posesión de un pequeño productor orientado hacia la auto-suficiencia chacarera (por lo general un encomendero) por el capital comercial no funcionó para el perjuicio del sistema, sino como un cambio de manos de la propiedad inmobiliaria rural, que comenzó siendo organizada y trabajada dentro de una estrategia de gran productor, como opuesta a una de pequeño productor, con el fin de cumplimentar las funciones socio-económicas asignadas por el capital comercial.

La estrecha franja de tierra poblada por los primeros residentes de Buenos Aires consistió en diferentes pagos o condados. Estos diferentes pagos estuvieron distribuidos ecológicamente. Mientras el condado de Monte Grande, al norte de la ciudad, subsecuentemente llamado la Costa de San Isidro, fue distribuido por los gobernadores con el propósito de destinarlos a la siembra de trigo y maíz, la tierra de la Magdalena al sur, y la de Luján al oeste fue distribuida por los gobernadores con el propósito de establecer la base desde la cual organizar la gran cacería (vaquerías) de ganado salvaje o cimarrón.

Como resultado de la creciente demanda de provisiones por parte de las plantaciones de azúcar del Nordeste de Brasil así como de la necesidad de proveer bastimentos para las caravanas de esclavos que viajaban desde Angola en tránsito al Perú y al Alto Perú, para las tropas militares arribadas de España en tránsito a Chile,<sup>324</sup> y para las tropas procedentes del interior para defender Buenos Aires (1594, 1616, 1625 y 1645), la frontera rural de Buenos Aires se expandió en las décadas de 1620 y 1630.<sup>325</sup> De aquí que, la demanda de azúcar de Europa, las guerras Araucanas en Chile, las invasiones Guaycurúes en Santa Fe, y la amenaza de invasiones foráneas en Buenos Aires tuvo un impacto positivo en la economía agraria de Buenos Aires. Para garantizar la provisión de las tropas la corona estipuló, a través de los gobernadores, el otorgamiento de tierras y de encomiendas indígenas. Sucesivos gobernadores, como Rodrigo Ortiz de Zárate (1583-85), Juan de Torres de Vera y Aragón (1587-89), Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias (1591-94, 1602-09, y 1615-18), y Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda

(1599-1602), movieron gradualmente la frontera hacia el norte de Buenos Aires distribuyendo tierra que correspondía a los pagos de Matanza, Conchas, Cañada de la Cruz, y Areco. Más luego, en las décadas de 1620 y 1630, los gobernadores Francisco de Céspedes (1625-30), Pedro Estéban Dávila (1631-37), Francisco de Avendaño y Valdivia (1640) y Mendo de la Cueva y Benavidez (1638-40), distribuyeron las tierras del pago de los Arrecifes, ubicado mas al norte, y movieron la frontera del pago de la Magdalena mas hacia el sur, todo debido a la necesidad de retribuir a aquellos residentes de Buenos Aires que ayudaron a montar expediciones militares contra los indios Guaycurúes y Calchaquíes, del área del Río Bermejo (Chaco). El total de tierras distribuidas alcanzaron alrededor de las 800 leguas cuadradas (ver Tabla 1).

## **E-II Estrategias de desarrollo rural**

Sin embargo, debido a la creciente escasez de capital y de indios encomendados locales, la mayoría de las familias fundadoras porteñas que no recibieron mercedes de tierras en las últimas distribuciones se fundaron en una estrategia de desarrollo rural en pequeñas unidades, en economías de subsistencia, y en familias extensas. Como resultado, muchas de las viejas familias fundadoras vendieron sus propiedades. De acuerdo con Miguel Ángel Lima, de los 64 encomenderos y terratenientes de la expedición de Juan de Garay de 1580, 21 (o el 33%) dejaron la ciudad en los siguientes dos años. También, en la revista militar de 1602 Lima encontró solo siete pobladores de los 64 pobladores originarios que fundaron Buenos Aires. Y de los 84 miembros de los permisos de exportación de 1602, solo 14 pobladores originarios fueron mencionados.<sup>326</sup> Pero nuevos residentes poblaron Buenos Aires luego de 1580. Ya en 1582 el Cap. Juan de Espinosa arribo a Buenos Aires con numerosos nuevos pobladores desde Santa Fe. Un año más tarde, en 1583, el navío de Alonso de Vera y Aragón y la flota del General Sotomayor arribaron a Buenos Aires desde España. Muchos de los soldados que lo acompañaron desertaron y permanecieron en Buenos Aires. Los Gobernadores clasificaron estos pobladores y sus familias en una escala de cinco grados de antigüedad, con el objetivo de asignar el derecho a la cuota para exportar harina y tasajo al Brasil. A los más antiguos les era asignado el título de Primeros Pobladores y los más nuevos la dignidad de Quintos Pobladores.<sup>327</sup> No obstante, los descendientes de estos pobladores permanecieron en la ciudad. De acuerdo con la información por mi relevada, 31 pobladores (o el 48%) estuvieron presentes en el permiso de exportación de 1602.<sup>328</sup> Otros 23 descendientes de los primeros pobladores encomenderos estaban aún presentes como terratenientes en 1602. Pero de los 54 primeras familias pobladoras sobrevivientes que poseían inmuebles rurales en la primera mitad del siglo XVII, 30 residentes, o el 56%, vendieron 57 chacras, o el 35% de todas las chacras vendidas en este período, y 24 residentes, o el 44% vendieron 32 estancias, o el 29% de todas las estancias vendidas en la primera mitad del siglo (ver Tablas 2 y 3). De igual manera, de las 60 familias sobrevivientes de los primeros pobladores que poseían inmuebles urbanos en 1602, 37 residentes o el 62%, vendieron 62 casas y lotes urbanos en la primer mitad del siglo (ver Tabla 4). De acuerdo con mi información, seis (6) primeros pobladores vendieron 20 inmuebles; dos (2) terceros pobladores vendieron cinco inmuebles; y tres (3) cuartos pobladores vendieron ocho (8) inmuebles; y siete (7) quintos pobladores vendieron 17 inmuebles. De aquí que, estas cifras corroboraron aun mas la existencia de un desplazamiento social y económico.

Las viejas familias fundadoras que no se vieron desalentadas por el ímpetu económico de los tratantes de esclavos constituyeron el núcleo central de la facción política Benemérita. Ellos eran muy pocos y debieron su éxito económico esencialmente al

hecho de haberse embarcado en un comercio orientado hacia el mercado interno y haber adquirido esclavos negros sin endeudarse con los comerciantes de esclavos Portugueses, que constituían el núcleo central de la facción Confederada. Estos individuos incluían a Pedro Gutiérrez, un terrateniente que adquirió cinco esclavos y que había sido el abogado de los herederos del Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón en 1611 y el Alcalde de Primer Voto elegido por el Gobernador Céspedes en 1629; Cristóbal Naharro, un dueño de atahonas o molinos harineros que adquirió diez esclavos; Francisco Pérez de Burgos, un encomendero que poseía cinco esclavos; Miguel del Corro, y Andrés Ximénez de Fuentes. El caso de Hernandarias, aunque un residente de la ciudad de Santa Fé, era quien mas sobresalía, por cuanto su viuda declaro mas de 64 esclavos, la mayoría de los cuales fueron obtenidos mediante secuestros aduaneros cuando fue juez en procedimientos relacionados con confiscaciones de mercancías prohibidas.<sup>329</sup> En otras palabras, el núcleo central de la facción Benemérita debió su fuerza económica a instrumentos extra-económicos para la obtención de fuerza de trabajo. Mas luego, en la década de 1630, este patrón de comportamiento económico continuó. El General Gonzalo de Carvajal y el General Amador Váez de Alpoin, ambos productores orientados hacia el mercado interno, y el primero un conocido líder de la facción Benemérita, fueron capaces de adquirir libremente fuerza de trabajo indígena en sus expediciones fracasadas para la recuperación de Concepción del Bermejo.<sup>330</sup>

### **E-III Emergencia de una producción agraria de gran escala**

La emergencia de una producción agraria de gran escala y orientada al mercado y de un comercio orientado a la trata de esclavos removi6 gradualmente de la elite dominante porteña aquellos terratenientes cuya base social consistió en la tenencia de indios encomendados locales. Los empresarios urbanos no-encomenderos emergieron como los principales agentes responsables en presionar los salarios de la mano de obra en competencia directa con los encomenderos. La baja rentabilidad del sistema encomendil convenció a muchos encomenderos de migrar. Algunos de estos prefirieron vender su derecho a las encomiendas de indios antes que retornar a sus localidades de origen. Esto ocurri6 con el Cap. Victor Casco de Mendoza, quien en 1609 renunci6 la encomienda de la nación Guatoma asi como la nación Guatabu en la provincia del Paraguay.<sup>331</sup> En forma similar, el Cap. Juan de Vallejo, el Tesorero Real de Buenos Aires, renunci6 en 1633 los indios del repartimiento de Guana en Chile en la persona del General Diego Xaraquemada.<sup>332</sup> Pero los empresarios no-encomenderos no fueron los únicos en poseer esclavos africanos en Buenos Aires. Desde comienzos del siglo, los encomenderos de Buenos Aires también invertían en esclavos. En 1613, cuando el encomendero-comerciante Sebastián de Horduña alquil6 ocho indios Chaná de su propia encomienda de Baradero, sirvió de fiador conjuntamente con Miguel Rivadeneyra, Crist6bal Naharro y Juan Nieto de Humanes, en beneficio del traficante de esclavos Hernán Gómez y con el objetivo de introducir 129 esclavos de Angola. Más luego, en la década de 1620, esta tendencia se increment6.<sup>333</sup> La Tabla 5 nos muestra como Sebastián de Horduña fue socio en ocho transacciones introduciendo 70 esclavos, y Lorenzo de Lara, un encomendero del pago de la Magdalena, era socio en tres transacciones que introducían 48 esclavos, y Alonso Guerrero de Ayala, otro encomendero, introducía 198 esclavos.

### **E-IV Clanes familiares ligados a la encomienda**

Las viejas familias chacareras porteñas o los clanes familiares ligados a la encomienda adquirieron la primer suerte de tierra a través de transacciones no monetarias (herencias, legados, dotes, o donaciones). Este modo de adquisición inmobiliaria representó la transferencia de riqueza por antonomasia dentro de la existente elite terrateniente. El nuevo sector rural de terratenientes no-encomenderos, mostrados en las Tablas 6 y 7, entró en el rango de los propietarios adquiriendo venalmente propiedad real o de la corona, o a través de donaciones y adquisiciones a no parientes. Existía una bastante extensa creencia entre los terratenientes no-encomenderos que la tierra adquirida podría ser mas fácil de enajenar que la tierra heredada. Estos recién llegados representaban a los nuevos ricos ligados con la emergencia de una producción a gran escala orientada al mercado que exportaba trigo y harina al nordeste del Brasil. Acumularon suficiente riqueza a través de la trata de esclavos y el contrabando que cómodamente pudieron adquirir su ingreso a la clase terrateniente.

Conocer si los viejos o los nuevos estamentos estaban invirtiendo sus intereses en chacras o estancias clarificará el problema. Mientras las chacras fueron usualmente poseídas por intereses orientados hacia el mercado externo exportador de trigo (un estamento nuevo), las estancias fueron poseídas por productores orientados hacia el mercado interno producto de mulas (un estamento viejo). Un modo fácil de determinar esto es analizando la manera en que cada una de estas dos clases de propiedades fue adquirida. La compraventa era la única vía en que la clase contrabandista penetró en el estamento terrateniente. Las herencias, en su lugar, fue el modo más común para el viejo estamento de los vecinos fundadores de atar su nombre a la tierra. De lo que puede ser deducido de la Tabla 8, la historia de la tenencia rural de Buenos Aires confirma que para la transferencia de las chacras la venta era un medio mas común de traspaso que la herencia (donaciones mas dotes). Entre 1602 y 1642 las chacras cambiaron de manos un total de 226 veces. Solo 89 de las 226 transferencias fueron a través de legados y dotes; las transferencias remanentes (61%) fueron por compra-venta (Tabla 8).

En su lugar, entre las estancias, la compra-venta era mucho menos común como medio de transferencia que la herencia. Las estancias cambiaron de manos un total de 245 veces. Solo un centenar de las 245 transferencias fueron a través de legados y dotes; las 111 remanentes (53%) fueron por venta. La carencia de registros notariales antes de 1602 hace difícil de evaluar la frecuencia de las ventas de chacras y estancias en el siglo XVI. De aquí que, estas cifras corroboran aun mas el hecho que la producción orientada hacia el mercado que exportaba harina al Brasil estimuló una alta movilidad dentro del mercado de tierras de chacra, dejando en su lugar al mercado de tierras de estancia casi estancado.

En el pago de Monte Grande, un pago de chacras, de un total de 46 propiedades distribuidas en 1582, una suerte cambió de propietarios a través de compraventas cuatro veces, otra en tres oportunidades, siete propiedades dos veces, y 28 propiedades al menos una vez en el periodo entre 1602 y 1640. De las 64 mercedes de chacras otorgadas en 1582, una cambio de propietarios solo a través de legados y dotes durante 60 años. En los pagos de Matanza y Las Conchas, debido a que estaban ubicadas en tierras de menos valor, la propiedad circuló menos y pareciera haberse extendido pretensiones mas fuertes de "mantener el nombre en la tierra". Del total de casi 50 propiedades en Matanza en 1610, solo tres estuvieron mediante legados y dotes en la misma familia durante 60 años. Dos de estas propiedades fueron las otorgadas en merced por el Gobernador Hernandarias a Simón de Valdéz en 1609 y donadas a la Orden Dominica por sus herederos en 1709,<sup>334</sup> y la merced de tierra otorgada por Hernandarias a Mateo Leal de Ayala en 1609 y vendida por

su nieta Petrona Cabral de Ayala, a Andrés de Ávila en 1728.<sup>335</sup> En forma semejante, la merced de tierra otorgada por el Gobernador Juan de Torres de Vera y Aragón a Cristóbal Naharro en Junio de 1588 fue vendida por su bisnieto Diego de Giles a Francisco Rodríguez de Estela en abril de 1682.<sup>336</sup> De la casi medio centenar de propiedades en el pago de Las Conchas en 1610, solo siete se perpetuaron en la misma familia durante 60 años. Mucha persistencia en "preservar el nombre en la tierra" era inusual debido al crecientemente expansivo mercado inmobiliario. De un total de siete casos, el más prolongado comprendió la chacra de Domingo Griveo. Dos siglos mas tarde, en 1823, sus tataranietos, la familia Ibarrola, vendió la propiedad a José Las.<sup>337</sup> Sin embargo, la existencia de "tierra libre" en la frontera rural conspiraba contra una prolongada persistencia en "mantener el nombre en la tierra".

En contraste con el absoluto mono-cultivo de las plantaciones de azúcar brasileras, las chacras de la provincia de Buenos Aires eran diversificadas, muchas de ellas sembraban trigo para alimentar su propia población así como para la venta al mercado porteño y para la exportación al Nordeste Brasileño. Más aún, la labranza de trigo y maíz en Buenos Aires fue mucho menos intensiva en mano de obra que el azúcar en Brasil. En otras palabras, el trabajo de preparar la tierra, sembrar, cosechar, y procesar la cosecha estuvo mucho mas imparcialmente distribuido a través del año. Aparte de esto, el trigo y el maíz no se pudrían inmediatamente después de la cosecha como el azúcar, de manera que los esclavos Africanos y los indios asalariados podían ser empleados en ensacar, moler y fabricar harina y pan.

La producción agraria en gran escala en la provincia de Buenos Aires durante la primer mitad del siglo XVII fue intentada solo por aquellos productores que estaban preparados para competir en una estrategia de gran productor con el propósito de generar una ganancia. Por una estrategia de gran productor entiendo la combinación del alquiler de una fuerza de trabajo asalariada, emplear una clase administradora de capataces y mayordomos, subordinar al capital comercial a través de créditos de largo plazo, e invertir en bienes intensivos en capital. Los principales exponentes de esta clase de producción durante la primer parte del siglo XVII fueron un total de 20 pobladores (ver Tablas 6 y 7). Por ejemplo, Amador Váez de Alpoin, originalmente un traficante de esclavos, devino un dueño de chacras y estancias en 1605 cuando le compró a Pedro Álvarez Gaitán el derecho a sus tierras, lotes urbanos, estancias, etc., por \$130.<sup>338</sup> Tres años más tarde, Váez de Alpoin compró mil varas de frente en el pago de Monte Grande (tierras de chacra) y media legua de frente en el pago de Paraná (tierras de estancia). En 1622, Váez de Alpoin compró una chacra en el pago de las Conchas por \$80.<sup>339</sup> Un año más tarde, en 1623 Váez de Alpoin se la alquiló a Juan de la Torre a \$100 anuales y por la mitad de la cosecha de su chacra en el pago de Las Conchas. Además, Váez se comprometía a darle a Torres diez indios<sup>340</sup> Unos cuantos meses más tarde, empleó al capataz Francisco López en \$60 anuales para manejar su estancia del pago de Paraná.<sup>341</sup> Finalmente, otro año más tarde, en 1624, decidió compartir con Juan Bernal "la chacra que posee en el pago de Las Conchas para sembrar trigo y maíz por la tercera parte de su cosecha".<sup>342</sup> Mas aun, Váez de Alpoin se endeudó cuatro veces entre 1626 y 1643 por un monto total de \$2.979.

Otros ejemplos menos complejos fueron los de Juan Barragán, que empleo quince indios entre 1622 y 1652 y poseyó una chacra en el pago de Las Conchas y estancias en los pagos de Luján y Magdalena; Gaspar de Gaete, quien empleó cinco indios entre 1634 y 1639 y poseyó 29 esclavos que trabajaron en su estancia del pago de Magdalena; Marcos de Sequera, quien en 1632 compró dos chacras de 700 varas de frente en el pago de Las

Conchas valuadas en \$240 y tres estancias en el pago de Luján de una legua y media (9.000 varas) de frente, en 1637 y 1638, por un total de \$3.290.<sup>343</sup> Sequera alquiló 11 indios y poseyó 33 esclavos, diez de los cuales trabajaron en sus establecimientos de los pagos de Luján y Conchas. También, en 1637 alquiló el capataz Juan de Silvera por el término de un año en \$120.<sup>344</sup> Más aun, Sequera se endeudó cuatro veces entre 1633 y 1640 por un total de \$14.570. De igual manera, en 1633, Juan de Tapia de Vargas compró 857 varas de frente en el pago de La Matanza por un valor de \$103. En 1638, compró otras 700 varas de frente en el mismo lugar por valor de \$185.<sup>345</sup> Tapia de Vargas alquiló ocho indios y poseyó 60 esclavos que trabajaron en sus chacras del pago de Monte Grande y Matanza, así como en sus estancias del pago de los Arrecifes. También, en 1636, Tapia contrató al capataz Sebastián Gómez por el término de un año en la suma de \$100.<sup>346</sup> Además, Tapia de Vargas se endeudó en cuatro diferentes oportunidades entre 1633, el año que compró su primer chacra, y 1640, por un monto total de \$7.947. De manera similar, Bernabé González Filiano compró en 1634 una chacra en el pago de Monte Grande valuada en \$120, y en 1639 una estancia en el pago de Luján en \$280.<sup>347</sup> Más aun, González Filiano alquiló dos indios y poseyó hasta su muerte 28 esclavos que trabajaron en su chacra de Monte Grande así como en sus estancias de Lujan y Cañada de la Cruz. Finalmente, González Filiano se endeudó tres veces mediante préstamos personales entre 1634 y 1640 por un monto total de \$3.657. También se endeudó en \$500 mediante un préstamo hipotecario en 1632.<sup>348</sup> De aquí que, las actividades combinadas de comprar tierra en el mercado, alquilar indios y mano de obra foránea, y comprar esclavos africanos caracterizó la embrionaria naturaleza capitalista de la producción agraria de Buenos Aires.

Había además, casos en los cuales los terratenientes, que habían heredado tierras, actuaban también de un modo que podríamos caracterizar algo extemporánea o anacrónicamente, como una vía "junker". Este fue el caso de Enrique Enríquez, anteriormente un dueño de navíos, quien heredó tierras en el pago de la Magdalena de su suegro Francisco García Romero, quien en el pasado había militado con la facción Confederada. Durante su administración, contrató capataces en dos oportunidades. En 1622, contrató a Sebastián de Almirón por el término de un año en \$90. En 1632, contrató a Manuel Gómez Viera por un año en \$120.<sup>349</sup> Amén de su inmueble heredado, Enríquez adquirió en 1632 una estancia en el pago de la Matanza en \$100.<sup>350</sup> Seis años mas tarde, en 1638, Enríquez tomó prestado \$2.000, ofreciendo de garantía una estancia, que canceló en 1658.<sup>351</sup> Más aun, en 1644, Enríquez tomó prestado \$1.364 para reparar sus establecimientos rurales y comprar fuerza de trabajo esclava.<sup>352</sup> La emergencia de un estrato terrateniente mercantilizado se benefició de la estabilidad monetaria bajo hipotecas de muy largo plazo mientras que los precios de la producción se elevaban.

## **E-V Producción de ganado en gran escala**

La producción de ganado en gran escala se garantizaba mediante la contratación de un calificado supervisor. Para ser un capataz eficiente uno debía ser extraordinariamente versátil y capaz de lidiar con todo tipo de tareas, desde la construcción de carretas hasta el parto de las esclavas. La herramienta que los terratenientes ausentistas empleaban mas a menudo para asegurar el servicio de los capataces era el concierto notarialmente escriturado, que especificaba los deberes y derechos del terrateniente y del capataz. Establecía el monto del salario y el término de tiempo acordado para la prestación del servicio. La Tabla 9 registra 20 contratos de este tipo que una veintena de terratenientes contrajeron entre 1622 y 1642. Los salarios fluctuaban alrededor de un promedio de \$100 anuales. Los más altos salarios no superaban los \$160 anuales. Por ejemplo, Diego López,

el yerno de Sebastián Ramos, contrató a Gregorio Botello en \$160 por año. Los salarios más bajos no cayeron nunca por debajo de los \$50 anuales (ver Tabla 9).

La posición del capataz de tropa (de hacienda o ganado), o el de capataz de flota de carretas, en contraste con el de mayordomo de estancia, llevaba consigo un status social más alto. En efecto, el capataz de tropa ganaba salarios más altos que los de los mayordomos de estancia, o eran generalmente pagados con un porcentaje del ganado arreado. Los salarios de los capataces de tropa fluctuaban entre \$300 y \$500 anuales. Por ejemplo, el terrateniente Pedro Gutiérrez contrató en 1634 una pareja de capataces, Gerónimo Villarroel y Marcos Morales, en \$300 y \$400 cada uno,<sup>353</sup> y Juan Crespo Flores contrató a Juan de Herrera en \$500.<sup>354</sup> Estos altos salarios resultaban del hecho de que los capataces tenían con sus salarios que contratar la mano de obra indígena para realizar las tareas de arreo. Contrastando la Tabla 9 con la lista de empleadores no-encomenderos de indios que tengo en mi Banco de Datos, descubrí que los capataces Manuel Gómez, Diego Serrano y Juan Bautista Manso alquilaban numerosos indios.

El proceso de concentración de la tierra no ocurrió sólo por medio de mercedes de tierras. También resultó del uso del matrimonio endogámico como una estrategia para reforzar la concentración de tierra. La Tabla 10 nos muestra una lista de 25 terratenientes que casaron con hijas de propietarios de inmuebles rurales. Entre estos negociadores o intermediarios clánicos, la tierra urbana era preferida a la tierra rural. Observando específicamente la propiedad rural obtenida a través del matrimonio, observé que las chacras y las estancias constituían el 14% del valor total de todas las dotes y el 24% del valor total de los esclavos (ver Tabla 11). Examinando específicamente aquellas propiedades urbanas que habían sido obtenidas a través del matrimonio, encontré en una muestra de 200 dotes procesadas en la Tabla 11, que las casas y los lotes vacantes constituían el 26% del valor total de todas las dotes.

La producción de ganado en gran escala fue también lograda por medio de inversiones capital-intensivas. Para ese propósito, los potenciales criadores de ganado en Buenos Aires compraban toros y vacas. Por ejemplo, en 1632, Bartolomé Ramírez, un anterior producto de trigo, en compañía con el Cap. Pedro Hurtado transportó desde Santa Fé 300 cabezas de ganado. En forma similar, en 1639, el Sargento Mayor Marcos de Sequera adquirió de Diego López Camelo 200 vacas y 500 toros en \$250.<sup>355</sup>

La producción de ganado en gran escala estuvo también condicionada por la manera en que la carne era distribuida para el consumo público y privado. El derecho exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne era contratado por el Cabildo con individuos por el término de un año y bajo subasta. Cuando no había subastador privado alguno, el Cabildo mismo asignaba el derecho exclusivo a la matanza sobre la base de una rotación semanal, una semana para cada propietario de hacienda.

## **E-VI Monopolio de la oferta de carne**

Los matarifes obtuvieron un monopolio sobre su comercio a cambio de una sujeción a la supervisión Capitular y al control de precios. La razón de este monopolio era proveer la ciudad con carne al más bajo precio posible haciendo a un solo individuo responsable y de esa manera evitando las subas y bajas de un mercado libre y competitivo.<sup>356</sup> No obstante, las fuerzas del mercado entraron en juego, especialmente del lado de la oferta. La creciente oligarquía terrateniente criolla sacó provecho del monopolio

de oferta de carne. Aunque estaba en teoría completamente abierto a la postura pública, el derecho exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne, o contrato de abasto, estaba efectivamente restringido a aquellos grandes terratenientes como Blas de Mora en 1618, o Antón Higuera de Santana en 1620, quienes podían ellos mismos abastecer el ganado necesario, o de lo contrario a aquellos comerciantes como Martín de Ávila en 1605 o Francisco Gómez Prieto en 1608, quienes tenían suficiente capital para comprar lo que necesitaban (ver Tabla 12).

Cuando era directamente administrado por el gobierno de la ciudad, el abasto continuó canalizando hacia Buenos Aires el ganado de la oligarquía terrateniente criolla. Aunque la oligarquía terrateniente criolla ejerció un control monopolístico sobre la oferta de carne a la ciudad, las estructuras políticas permitían el acceso a otros que querían vender carne. Por ejemplo, en 1616, debido a que el Gobernador de Buenos Aires había prohibido la matanza de vientres en la pampa (para prevenir su exterminio), ningún terrateniente estaba inclinado a comprometerse para abastecer la ciudad con carne. El Cabildo ordenó a los vecinos que poseían ganado la obligación de faenar solo los días sábados y entonces solo en rotación con otros vecinos poseedores de ganado.<sup>357</sup> Sin embargo, más luego, en la década de 1630, la prohibición de matar hacienda realenga, o, en otras palabras, la exclusividad de matar ganado, devino una pre-condición demandada por los abastecedores de carne.<sup>358</sup>

Las compañías eran también un indicador de la producción agraria porteña de gran escala orientada hacia el mercado externo así como de la liquidación del encomendero autosuficiente. Los terratenientes porteños entraron en sociedades y compañías con parientes o amigos para combinar recursos para financiar la transformación y consolidación de sus propiedades. Por ejemplo, en 1616, Gerónimo de Medrano y Juan Barragán, ambos amigos, compraron una estancia en el pago de Luján. Luis Gaitán y Juan Rodríguez Gaitán, primos, compraron 500 varas de frente en el pago de la Magdalena en 1619.<sup>359</sup> En forma similar, la compañía de dos personas formada por Christóbal Naharro y Juan Alonso de Vera y Zárate, Luis Cordobés y Gonzalo de Acosta, y Martín de Ávila y Juan Domínguez Palermo alcanzaron acuerdos financieros en negocios rurales en 1608, 1614, y 1615, respectivamente.<sup>360</sup> Las compañías desaparecieron en la década de 1630, cuando los terratenientes habían acumulado suficiente capital para adquirir los inmuebles por separado. Esto, por cierto, implicó que la mitad de los socios lograron triunfar económicamente a expensas de sus socios.

La acumulación capitalista en la agricultura puede tomar la forma de una inversión intensiva en capital en un área geográfica dada y no del incremento de sólo el área geográfica. En efecto, la propiedad de molinos de agua y de viento, atahonas y percheles son también factores que ayudaron a acumular capital.<sup>361</sup> De acuerdo a la Tabla 13, los testamentos muestran la existencia de 20 atahonas o molinos harineros y 13 graneros (percheles) sobre un total de 115 testamentos. De un total de 53 testamentos que incluían en sus ítems molinos y graneros, 30 o el 57% fueron emitidos por viudas. De aquí que, no es sorprendente que los molinos, conjuntamente con los esclavos, hayan sido los principales activos productores de ingresos dejados a las viudas.

Aparte de las atahonas (molinos) y percheles (graneros), el tipo de inversión agrícola intensivo en capital tomó la forma de los viñedos. Los viñedos fueron también un medio de incorporar a Buenos Aires en el mercado interno colonial. La tierra plantada con

viñedos llevaba los precios más altos, requería la más alta tasa de mano de obra y de acuerdo con Cushner (1980),

"...era factible sólo a aquellos con substanciales sumas de dinero, por cuanto el comprador debía de comprar la casa, las bodegas, las máquinas de prensar y una enorme fuerza de trabajo esclava".<sup>362</sup>

La necesidad de cercar las viñas es una de las razones porque tan alto grado de mano de obra era necesario. En el caso de Buenos Aires, cuatro testamentos y dos ventas notariales revelan la existencia de viñedos (ver Tabla 14). Mientras la chacra que tenía el mayor número de plantas era la de Pedro Pedraza Centellas, con 18.000 plantas, o el equivalente de 3.600 barriles de vino, localizadas en el pago de Monte Grande; la que empleó el más alto número de esclavos fue el viñedo de Antón Higuera de Santana con 28 esclavos localizado también en Monte Grande y productor de alrededor de 3.200 barriles (ver Tabla 14). Con relación a la producción de vino, el número de viñas cultivadas variaba por localidad. De tres pagos o condados donde los testamentos mencionan la existencia de viñedos, el que tuvo en cuenta los viñedos más grandes fue el pago de Monte Grande, seguido por el de Magdalena, y después por el de Matanza.

Por cuanto los empresarios Bonaerenses estaban interviniendo directamente en la producción agraria, la acumulación comercial afectó en forma instantánea las relaciones rurales de propiedad. La ciudad de Buenos Aires así como la campaña creció en el contexto de un cambio en las relaciones sociales. Como resultado de este cambio, no todos los vecinos de Buenos Aires compartieron la misma identidad socio-económica. Mientras los más ricos comerciantes monopolistas fueron tanto propietarios rurales como urbanos, aquellos menos ricos y del ramo minorista llenaban una u otra categoría. Por ejemplo, una minoría de terratenientes urbanos, aquellos que eran grandes comerciantes, fueron también vendedores y compradores de chacras y estancias. De un total de 194 vendedores de inmuebles urbanos, solo 24 fueron vendedores de chacras y 11 de estancias. Algunos de los vendedores de inmuebles urbanos fueron también dueños de chacras, estancieros, y vendedores de esclavos. A propósito, ocho vendedores de inmuebles urbanos fueron también vendedores de estancias y chacras; cuatro fueron vendedores de estancias y esclavos; tres fueron vendedores de chacras y esclavos; y otros tres fueron vendedores de estancias, chacras y esclavos. De igual manera, de un total de 194 compradores de inmuebles urbanos, solo 34 fueron compradores de chacras y 15 de estancias. Algunos de los compradores de tierra urbana fueron también dueños de chacra, estancias y compradores de esclavos. In efecto, hubo seis compradores de inmuebles urbanos que también fueron compradores de chacras y esclavos y dos que fueron compradores de estancias y esclavos.<sup>363</sup>

En suma, uno puede concluir que la penetración de relaciones comerciales en la campaña aceleró un intenso mercado de tierras urbanas y rurales. En este sentido, los propietarios de esclavos, no compartían un gran porción del mercado de tierras de chacra. De 107 vendedores de chacras, solo 14, o el 13%, fueron también vendedores de esclavos. De igual manera, solo 10 compradores de un total de 107 compradores de chacras fueron también compradores de esclavos. Por otro lado, los propietarios de esclavos, los terratenientes fueron también compradores y vendedores de inmuebles urbanos. Actualmente, entre 82 compradores de inmuebles rurales, solo 26, o el 32%, fueron también compradores de inmuebles urbanos y seis fueron compradores de casas y esclavos. En forma semejante, entre 82 vendedores de estancias, solo 21 o el 26%, fueron

también vendedores de inmuebles urbanos, y siete o el 9%, fueron ambos vendedores de esclavos y lotes urbanos. Asimismo, entre 107 compradores de chacras, solo 34 o el 32%, fueron también compradores de inmuebles urbanos, y siete fueron ambos vendedores de esclavos y lotes urbanos. Aparentemente, los dueños de estancias compartían una porción más grande del mercado esclavo que los dueños de chacra. De hecho, de 82 vendedores de estancias, 23 o el 28%, fueron vendedores de esclavos. De igual manera, de 82 compradores de estancias, 16 o el 20% fueron también compradores de esclavos.

En suma, este capítulo ha verificado como la penetración capitalista en la campaña de Buenos Aires bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambió los patrones culturales, de una estrategia "farmer" (producción de pequeña mercancía), administrada por la facción Benemérita, hacia una estrategia "junker" (de producción agraria en gran escala, orientada al mercado), de desarrollo rural, administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, este capítulo ha demostrado que para estimular una estrategia "junker" de desarrollo rural una clase terrateniente no-encomendera de empresarios recurrió a la adquisición de tierra pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda brasilera de vituallas.

## Capítulo I-B-6                      **Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial.**

### Índice

- F-I      Mercado de mano de obra esclava.
- F-II     Rotación sufrida por cada esclavo en forma individual.
- F-III    Sobre-valorización de la mano de obra esclava.
- F-IV    Restricciones extra-económicas.
- F-V     Esclavitud estipendiaria.
- F-VI    Derecho a pedir papel de venta.
- F-VII   Manumisión esclava.
- F-VIII Plazos de amortización en las manumisiones.
- F-IX    Fronteras raciales.

### **Introducción del capítulo I-B-6**

En el Río de la Plata, se suscitó con respecto a la movilidad social de los esclavos un debate aún inconcluso. Las investigaciones de Besio Moreno (1939), fundadas en censos y padrones, sostuvieron que el desarrollo de la población de color libre fue función de la elevada incidencia de la manumisión en esa región. Más luego, Johnson (1974) probó que el fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las castas, especialmente para los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para la seguridad económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa tradicional. Posteriormente, Johnson (1978) argumentó que no fue la cantidad de manumisiones, sino el sexo de los esclavos liberados lo que explicaba ese crecimiento, para concluir que este último crecimiento en realidad obedecía a la creciente capacidad de los esclavos para percibir mayores ingresos.<sup>364</sup> En esta misma línea de pensamiento, Rosal

(1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la propiedad inmueble urbana, permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social que les hubiera sido negada dentro de la estructura estamental tradicional. No obstante estas evidencias, McCaa, Schwartz y Grubessich (1979), y McCaa (1984) concluyen que la expansión capitalista en América Latina en lugar de acelerar la erosión del régimen estamental lo reforzó. Sin embargo, para el Brasil, Viotti da Costa (1966) probó que las relaciones entre señores y esclavos podían variar conforme al nivel de desarrollo de las diversas áreas: se humanizaban en momentos de crisis, cuando la economía comercial retrocedía a los niveles de subsistencia; y se agravaban cuando el carácter capitalista de la empresa agraria se acentuaba y las fazendas se especializaban.<sup>365</sup> Jouve Martín (2005) para el caso de Lima a fines del siglo XVII descubre una sociedad donde existía una población de color que litiga, contrata, testa, y denuncia abusos y malos tratos. Y Turner (1995), para el caso de Jamaica, prueba la existencia de una transición del esclavo-mercancía al esclavo-jornalizado.

En este capítulo, que es una nueva versión de un trabajo antiguo del autor, nos hemos limitado a indagar el mercado de mano de obra esclava y el rol jugado por el estamento esclavo en la actividad laboral.<sup>366</sup> En ese sentido nos preguntamos si la vigencia de los estamentos se hallaba o no relacionada con los obstáculos para la formación de una clase social subordinada (peonaje urbano). El pasaje de estamento (esclavo) a clase social (peón o proletario) encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. Sin embargo, a diferencia de Bahía (Brasil) y la costa del Perú, donde regía una esclavitud de plantación, en las grandes ciudades como Lima, Buenos Aires, Montevideo, Popayán y Asunción, regía en la producción artesanal y en el servicio doméstico, una esclavitud estipendiaria.<sup>367</sup> Por esta última entendemos aquella donde los amos obligaban a sus esclavos a contribuir con un tributo individual llamado jornal. Este era un gravamen pagado individualmente en moneda a un amo en particular. El tributo en moneda obligaba al esclavo estipendiario a alquilar o conchabar su fuerza de trabajo fuera del dominio del amo, o bien producir mercancías (bienes o servicios) para la venta en el mercado colonial. El valor de cada esclavo se estimaba según el precio de cambio que alcanzaba el producto-tributo en el mercado. De esta forma, el tributo en dinero obligaba a los esclavos a incorporarse al mercado colonial y significaba que los dueños de obrajes, panaderías, atahonas, hornos de ladrillo, etc. contaran con más mano de obra que si el tributo no se cobrara. La incorporación forzada al mercado de trabajo colonial no lo privaba al esclavo de cierta fuerza de negociación propia con que extraer concesiones y limitar el control que sus amos ejercían sobre ellos, inexistentes en las economías de plantación, tales como la libertad de trabajar y pernoctar fuera de la casa de su amo, el derecho de reclamar la venta de sí mismo (papel de venta) cada vez que no se hallaba con su actual amo y encontraba otro amo alternativo que le ofrecía mejores condiciones de vida y trabajo, la facultad de acumular un peculio propio, y el derecho a endeudarse y rescatar su propia libertad y la de sus parientes próximos.<sup>368</sup> La suerte de un esclavo difería también según que fuere ladino o bozal, negro o mulato, joven o viejo, varón o hembra, con oficio o sin oficio, o de origen urbano o rural. También difería según en qué momento histórico se había concretado su incorporación a la sociedad porteña.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la información de diversos padrones de época, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de escrituras notariales, todas ellas depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. También nos

hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>369</sup> así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>370</sup>

## **F-I El mercado de mano de obra esclava.**

La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en mano de obra esclava revelaba la movilidad social existente. Durante el siglo XVIII el mercado de mano de obra esclava (de ahora en más MMOE) del litoral del Río de la Plata se mantuvo en una tónica por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 78 compra-ventas de esclavos,<sup>371</sup> en Buenos Aires, en igual período se registraron 8.466 compra-ventas y 864 manumisiones, y desde 1701 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 16.318 compra-ventas y 1.932 manumisiones. El Gráfico F-I, fundado en la Tabla G-I, ilustra las fluctuaciones del MMOE. A posteriori de la Paz de Utrecht (1713), durante la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1718-22) el MMOE creció de un promedio de 15 operaciones anuales por valor de \$4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el quinquenio 1719-23. Durante la segunda confiscación (1727-30), el MMOE creció casi un 100%, de un promedio de 33 operaciones anuales por valor de \$10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68 operaciones anuales por valor de \$18.000 en el cuatrienio 1727-30. Asimismo, mientras que en la década previa a la caída de Portobello (1730-40) se registraron un promedio de 66 operaciones anuales por valor de \$15.000, en la década posterior (1741-49), se registraron un promedio de 213 operaciones anuales por valor de \$49.000. Con la Guerra de los Siete Años (1756-63) el MMOE creció de un total de 111 operaciones por valor de \$25.000 en 1756 a un total de 165 operaciones por valor de \$32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de esclavos comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al 23% (Tabla G-I). No siempre la oferta de mano de obra esclava procedía de ultramar. En múltiples ocasiones los esclavos procedían del interior del espacio de influencia porteño. La Tabla G-II nos revela para 1776 el número de mulatos, zambos y negros esclavos, correspondientes al Obispado del Tucumán, discriminados por sexo y estado civil, muchos de los cuales provenían de Buenos Aires, y otros que procedentes de Lima o Santiago de Chile, terminaron su carrera de esclavos en Buenos Aires. Cuando en 1776 se remataron en Santiago de Chile 609 esclavos de la Compañía de Jesús, 127 de los mismos se enviaron a Buenos Aires por ser su precio superior en ésta última plaza.<sup>372</sup> En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los mercados de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MMOE creció tres (3) puntos logrando un promedio del 7% (Tabla G-I). Como consecuencia de las Guerras de la Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial española, experimentan un impacto aún mayor que en la guerra precedente debido al éxodo de comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial porteña. El período de paz que siguió al Tratado de Amiens y que concluyó la segunda Coalición contra Francia (1802-03) se reflejó igualmente en los mercados de bienes de renta. El precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla G-I). Con la reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en 1804, los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. Con relación al MMOE, este experimentó un alza del 13% (Tabla G-I). Una vez reconquistada Buenos Aires de manos inglesas y sellada la paz con Inglaterra a resultas de la invasión de España por los Franceses, el mercado de bienes de renta experimentó las consecuencias del arribo en aluvión de mercadería inglesa. El MMOE creció de \$59.176 en 1807 a \$80.800 en 1808, o el 27%

(Tabla G-I). Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado de mano de obra esclava debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de esclavos y las importaciones de esclavos.

## **F-II La rotación sufrida por cada esclavo en forma individual.**

Amén del estudio del mercado de mano de obra esclava es preciso también estudiar la rotación sufrida por cada esclavo en forma individual. A sólo 1.564 esclavos, varones y mujeres, que transcurrieron su vida útil en el Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se les pudo reconstruir parcialmente su historia dominial. Estos 1.564 esclavos correspondían a 1.217 escrituras, sobre un total de 15.246 compraventas protocolizadas entre 1736 y 1820. Sobre la base de esta reconstrucción parcial, unos 780 esclavos, correspondientes a 520 escrituras, casi la mitad de los 1.564 esclavos, sufrieron cuatro (4) amos o tres transacciones, la primera de ellas en papel simple sin protocolizar; casi medio millar de esclavos, más precisamente 507 esclavos, o la tercera parte del total de la muestra, sufrieron tres (3) amos o dos transacciones; 170 esclavos, o el 10% del total de la muestra, sufrieron cinco (5) amos o cuatro transacciones; y 40 esclavos, experimentaron entre seis (6) y siete (7) amos o cinco o seis transacciones.<sup>373</sup> Aparentemente, la rotación de los amos era más común entre los pulperos, pues "...haber sido esclavo de un pulpero y después de otro no media ninguna incompatibilidad; pues por lo común los esclavos (y más si son de la buena condición de Sebastián) mensualmente pasan de amo en amo".<sup>374</sup>

## **F-III La sobre-valorización de la mano de obra esclava.**

La sobre-valorización de la mano de obra esclava, producto de la especulación, es factible también de ser mensurada mediante la información notarial o fiscal (alcabala), sólo cuando tomamos los casos de los esclavos sanos y no calificados. El cálculo de la sobre-valorización y desvalorización de la mano de obra esclava en los esclavos calificados por un oficio artesanal o descalificados por vicios o tachas, se complica por cuanto para lograrlo sería menester descontar el costo del aprendizaje y agregar la depreciación provocada por los vicios y las tachas. Por otro lado, la sobre-valorización y desvalorización del esclavo no es uniforme en todas las edades, sino que, por el contrario, existió un proceso de diferenciación biológica (sexo y edad) del esclavo, que sugiere la existencia de rentas diferenciales por razones de sexo, edad, y ladinización. Es así que tomando como período base las últimas décadas del siglo XVII y como dimensión a mensurar los varones negros sanos y sin calificar de entre 18 y 22 años de edad su precio llegó a alcanzar en Buenos Aires una media de 700 pesos plata y en Lima un promedio de 1000 pesos plata. Pero en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), el precio medio cayó en más de un 70% por cuanto tocó un piso del orden de los 200 pesos plata. Sólo con posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90) el mercado de mano de obra esclava comenzó a repuntar. Experimentando en la década del 80 un alza que llegó al 50% del precio alcanzado en las décadas precedentes. A juzgar por la información recogida en los protocolos notariales de Buenos Aires un negro esclavo de las características mencionadas se cotizó en una media de 300 pesos plata.

## **F-IV Las restricciones extra-económicas.**

Pero el mercado de mano de obra esclava operaba, sobre la base de restricciones extra-económicas que impedían la libre concurrencia o competencia de los capitales, inhibiendo el desarrollo del mercado interno. Los esclavos que padecieron una persistencia en su dominio que los alcanzara toda su vida fueron muy escasos. Una prueba de la persistencia en el dominio estaba dada por la costumbre del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo,<sup>375</sup> y el retracto.<sup>376</sup> En 1732 Pedro Bautista Casajús, vecino de Corrientes, vendió al Lic. Juan Manuel de Arce el mulato Domingo de 20 años, que "...hube de los bienes de Juan de Toledo en virtud del derecho de preferencia en el tanto que me hizo en su testamento".<sup>377</sup> La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el encarecimiento del alquiler del esclavo.

Con respecto a la naturaleza específica de la esclavitud, una circunstancia era haber llegado a Buenos Aires antes de 1778 vía la Colonia del Sacramento, y otra muy distinta haber arribado como consecuencia del permiso para comerciar con colonias extranjeras (1791). A juzgar por las palabras del Dr. Francisco Pombo de Otero en los autos judiciales celebrados en 1778, entre Fermín Peña y el Pbro. Juan Antonio Guzmán, sobre el valor de una capellanía que mandó fundar su tío Juan Antonio Peña, a los esclavos estipendiarios "...les permiten los amos trabajar donde quieran, con la precisión de darles un tanto cada semana, reservando lo demás para sí".<sup>378</sup> En estos casos lo que sucedía es que "...los esclavos estipendiarios, después de dar al amo lo que corresponde, depositen en ellos lo suyo, o para libertarse de esclavitud o para otros infinitos fines".<sup>379</sup>

#### **F-V La esclavitud estipendiaria.**

La esclavitud estipendiaria venía a equivaler a un trabajo a destajo o por piezas, es decir a una suerte de etapa previa a la libertad condicionada. Cuando Juan Francisco Castro y Careaga se vió precisado en 1793 a litigar las condiciones reclamadas por el pardo zapatero Ceferino José Glacé, exclamaba a través de su abogado el Dr. José Darregueira,<sup>380</sup>

"...le concedí que viviese fuera de mi casa y que cuanto adquiriese con su trabajo pudiese hacerlo suyo, siempre que su proceder fuese arreglado, con sola la pensión de que había de venir dos veces cada día a servirme y hacerme dos pares de zapatos importe de \$4 todos los meses".<sup>381</sup>

Similar permiso al que Careaga concediera a Ceferino le había otorgado precedentemente su anterior amo: el Virrey Nicolás Arredondo

"...deducido el jornal que le entregaba a S.E., hacía suyo lo restante para su manutención y otros objetos que a él pudieran acomodarle, y en iguales términos logran idénticos permisos todos los criados de esta capital, que tienen oficio, y viven fuera de la casa de su amo".<sup>382</sup>

En otro caso suscitado por el esclavo zapatero Julián contra el Administrador de Correos de Asunción del Paraguay Don Nicolás de Igareda Barreda, este último manifestaba en 1802 que "...Julián me daba siete pesos al mes de jornal [es decir el equivalente a tres pares de zapatos] con calidad de que lo demás que ganase de su trabajo lo aplicase a su [propio] vestuario y alimento".<sup>383</sup> En el mismo escrito Igareda reconocía que él contaba con que siendo el oficio de su esclavo Julián el de zapatero

"...podía ganar diez y ocho pesos al mes cuando menos, y así le quedaban a su veneficio once pesos, y que por cierto es de su propia confesión que le quedan cuatro y medio pesos libres por mes ganando tan sólo once y medio pesos en su trabajo".<sup>384</sup>

El objetivo que Igareda y gran parte de los amos perseguían con esta política de incentivo hacia sus esclavos era, según lo manifestaba su letrado patrocinante el Dr. Juan José Castelli, la de que "...se estimulase al esclavo al trabajo, con el aliciente de su propio provecho, y que jamás se distrajese ni decayese en flojedad y vicios que trae la holgura".<sup>385</sup> De haberle Igareda por el contrario exigido a su esclavo Julián el cumplimiento de un horario y haberle asegurado alimentación y vestuario, como el jornal de siete pesos mensuales con que tributaba a su amo podía hacerse con sólo semana y media o dos de trabajo, "...bien fácil es comprender que el restante tiempo del mes lo malgastaría".<sup>386</sup> Pero si para evitar este desaprovechamiento el amo sugetaba a su esclavo "...a dar el todo de lo que trabajase mensualmente", Igareda razonaba con acierto que el peligro residía en que su esclavo se corrompiese, "...viéndose sin interés suyo", aunque él le diese todo lo necesario en materia de vestuario y alimentación. Del modo acordado, que consistía en no garantizar dichas prestaciones y en no exigir una prestación horaria o por tiempo, su esclavo Julián reportaba "...el beneficio de vestirse a su gusto y alimentarse a su modo, restándole algún líquido con cuio interés se anima a el trabajo".<sup>387</sup> Pero cuando el esclavo dejaba de contribuir con el jornal establecido, era común la denuncia policial seguida de su encarcelamiento. Cuando en 1784, Nicolasa Olivares vendió su esclavo Manuel, un oficial carpintero, a Raymundo Mariño, este se hallaba "...actualmente en prisión donde el comprador lo recibió, cuya prisión era debida a la licenciosidad en la que vivía, no dando ni pagándome los jornales diarios".<sup>388</sup> La tragedia para un amo era que la prisión en lugar de mejorar su comportamiento lo empeoraba. Ese fue el caso de Vicente Garate, quien emancipó condicionalmente de la esclavitud en 1808 a su esclavo mulato Agustín, de 18 años de edad. Agustín solía fugarse tan a menudo que Garate lo puso en la cárcel por una temporada, para hallar al cabo de un tiempo que

"...en teniéndolo en prisión el vicio y la vagancia lo atrapaban en tal grado que finalmente le propuso su manumisión para dentro de diez años bajo la condición que si fugaba de la zapatería o cometía otro cualquier exceso que mereciera castigo, esta libertad no tendría efecto".<sup>389</sup>

El peculio o beneficio que resultaba del permiso que los amos concedían a sus esclavos estipendiarios no sólo se difundió ampliamente en las zonas urbanas, sino que también alcanzó a extenderse a las relaciones sociales prevalecientes en las zonas rurales. Este fue el caso en Montevideo, en 1792, del negro Domingo, quien según el Dr. Mariano Zavaleta, adquirió simuladamente su libertad, pues algunos testigos producidos por el vendedor Andrés Yáñez, en litigio con los compradores Pedro Segovia y Eusebio González, afirmaban "...que alquilaba caballos los días festivos, que tenía compañía con un esclavo de la Mariscala, que hacía riendas y estribos de palo y vendía".<sup>390</sup> Y en 1796 del esclavo José, jornalero en el pago de la Magdalena, a quien su amo, Juan Ximénez de Paz, hacendado de dicho pago, le había permitido hacer algunas crías "separadas" de caballos con "facultad de beneficiarlas" pero sin darles la propiedad de ellas, para que invirtiese el producto en su alimento y vestuario "con el disfrute de mayor comodidad".<sup>391</sup> Con todo, el esclavo José no se conformó con sólo dicho permiso, sino que alegó el derecho de propiedad de dichas crías. En el litigio que se suscitó, Ximénez de Paz argumentaba que dicho permiso no podía extenderse a formar cría de mulas "...porque lo demás sería

constituirle en clase de propietario, dueño y Señor de lo mismo mío, cuando no tenía capacidad, ni tenía libertad".<sup>392</sup> Estas consideraciones de Ximénez de Paz fueron rubricadas por su abogado, el Doctor Juan José Castelli, para quien

"...Estos actos en los amos no dan propiedad en el esclavo, porque el contrato no es entre capaces de ambas partes, y por eso es que llevan implícita la reserva del dominio pleno en el Señor; así como cuando este mejora el trato de la vida del siervo con vestuario, habitación y muebles no es visto hacerlo dueño de todo, ni se priva el amo de quitarle cuando quiera lo que le permitió usar".<sup>393</sup>

De no ser así, y dejar de ser el negro José su esclavo, saliendo de su señorío, Ximénez de Paz le preguntaba al Defensor de Pobres

"...¿Estoy obligado yo a alguna prestación en favor de los esclavos ajenos? ¿debo yo alimentar los que fueron y ya no son míos? ¿Debe un amo dar a el esclavo que vende todo lo que tenía cuando estaba en su señorío?"<sup>394</sup>

En el caso del negro Antonio, capataz de la Quinta de Felipe Castilla, quien para 1796 se había fugado en repetidas oportunidades, su amo declaraba que

"...tuvo la osadía de adquirir un terreno que aún ignoro en que términos lo ubo y formar una quinta propia en el Bañado, construyendo en ella un ranchito muy grande con las maderas que cortaba en lo interior de el Monte de mi quinta, labrando y zanjeando toda la dicha quinta con los bueyes, arado, y demás herramientas de la mía, valiéndose para esta obra de los otros mis esclavos, y conchabando algún otro peón de su cuenta, teniendo abandonada la mía al cuidado de un solo negro viejo todo el tiempo que se ocupó en fundamentar aquella".<sup>395</sup>

El permiso o facultad para adquirir dominio con el trabajo propio, fuera de la casa del amo, se extendía al derecho de presentarse en juicio para todos los efectos civiles. Negarle esto último a un esclavo estipendiario no era posible sin hacer, a juzgar del Dr. Pedro Medrano, "...un manifiesto agravio a nuestro Estado, y dar una interpretación violenta y nada decorosa a las leyes que tratan de la materia".<sup>396</sup> Acaso, se preguntaba Medrano,

"...¿vivimos en un tiempo en que reynaba la tiranía y la ambición, y en el que la mayor parte de los hombres, se reputaban como una especie distinta de los Romanos, a quien la fuerza, hizo señores árbitros y despóticos de los que oprimía su injusticia?"<sup>397</sup>

El origen de la servidumbre era atribuida por Medrano en 1794, fecha de este litigio, a la tiranía, y en su principio "fue un efecto de ambición". Pero la naturaleza atenuada de la misma, al hacerse admisible en el día, era caracterizada por Medrano como "...moderada y reducida a ciertos límites que se le han prescripto".<sup>398</sup> Si bien en otros tiempos un esclavo, no obstante "...de que la naturaleza lo había dotado al igual de los demás hombres,...era incapaz de recibir injuria", a fines del siglo XVIII en Buenos Aires, según Medrano, "...ya no tiene lugar este sistema de la tiranía".<sup>399</sup> Aunque el derecho reputaba a los esclavos por muertos para los efectos civiles, "...esta voz no debe entenderse con tan rigurosa propiedad que por ello quiera excluirse de los juicios a los esclavos".<sup>400</sup> Ellos están muertos para todos los efectos civiles "...si sus amos no les permiten gozar de ellos". Al igual que las leyes que permitieron el que se pudiera libentar enteramente a los esclavos de la

servidumbre, Medrano concluye que los amos podrían otorgarles libertades parciales. De este derecho procede, según Medrano, "...que los esclavos con permiso de sus dueños, puedan adquirir dominio y propiedad en aquellos lucros que les proporciona su trabajo".<sup>401</sup> Estos lucros pertenecían por la servidumbre al señor del esclavo, pero Medrano se preguntaba

"...¿no podrá él renunciar de este derecho? ¿no podrá hacerlo a favor del mismo esclavo? ¿hay ley o razón que niegue a los dueños de esclavos esta facultad que su dominio les concede?",<sup>402</sup>

La libertad condicionada de la esclavitud estipendiaria se entiende mejor cuando en el anterior litigio, protagonizado por el pardo zapatero Ceferino Glacé, el Dr. Darregueira advertía que "...la palabra servir no siempre indica ni supone dominio, porque un siervo ajeno en quien no se tiene [dominio] y aún el hombre libre sirve,...y con todo no es esclavo, sino que se denomina criado".<sup>403</sup> Según el Derecho Real de entonces, el pardo Glacé servía al Dr. Careaga,

"...mas este obsequio no le es debido por razón de dominio, sino por el gravamen, y condición de servirle algún tiempo; la cual se convierte en modo por ser la libertad pura y simple, como lo insinúa el Padre Paz".<sup>404</sup>

#### **F-VI El derecho a pedir papel de venta.**

La crónica disputa del esclavo con su amo acerca del derecho a pedir papel de venta y acerca del monto del jornal a tributar daba lugar también a reiterados litigios judiciales. En el caso juzgado en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, entre el esclavo Mariano y el Dr. Agustín Pío de Elía, este último expuso que su esclavo

"...no le quería servir en su casa, ni en otra cualesquier parte, y que para vencer la repugnancia de su esclavo le había propuesto remitirle conchabado a la estancia de su hermano Ángel Mariano ["Potrero de San Lorenzo"] respecto a que le acomodaba mas la vida campestre y de estancia en que se había criado pero que tampoco había querido acceder a esta racional propuesta, añadiendo que más que todo quería que le vendiese".<sup>405</sup>

Los jueces José Riera y José Vicente Carrancio, antes de tomar una decisión oyeron al esclavo Mariano, quien

"...después de haber expuesto que no quería servir a dicho Dr., sino que más bien le vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia, se le hizo presente que su amo no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido, pues no quería dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don Estéban García de Zúñiga".<sup>406</sup>

Enterado de estas razones, el esclavo Mariano

"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le conchabase, y que ni quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve tratase de venderle su amo a un estanciero u otro que tuviese ejercicio de campaña, porque era lo que le acomodaba".<sup>407</sup>

Y en el caso entablado en 1799 por el esclavo barbero Manuel Antonio de Heredia contra su amo Tiburcio López de Heredia, solicitando papel de venta por la sevicia con que lo venía tratando, éste último dirigía todos sus esfuerzos para probar que su esclavo era un ladrón pues de 26 personas que por once años venía afeitando por orden suya "...sólo le contribuye lo que pagan seis, y se queda con lo que contribuyen veinte, que asciende a más de cuarenta pesos en cada mes", por lo que su tienda de barbería se arruinaba quedando "en estado que sólo le produzca siete pesos mensuales".<sup>408</sup> En su descargo, el esclavo barbero manifiesta no concebir que su amo sufriera con paciencia durante once años "...un robo tan considerable, y no quiera echar de sí un ladrón de esta clase, y procure mantenerlo en las mismas proporciones que continúe sus hurtos, lo que no se puede creer del más insensato".<sup>409</sup> Como de la lista de clientes de la barbería que el juez mandó confeccionar, el amo reconoció que sólo recibía lo que pagaban seis de los 26 manifestados por el esclavo Manuel, éste último se preguntaba si era creíble que su amo tolerase

"...que yo me quedase con tanta cantidad de pesos cada mes, y fuese tan sufrido que por tantos años disimulase este hurto, y no pasase a preguntarles [a sus clientes] si me pagaban, y se mantuviese [su amo] tan indolente contra sus mismos intereses que me dejase robar quieta y pacíficamente y arruinarlo".<sup>410</sup>

Por el contrario, el esclavo Manuel probaba la sevicia con que su amo lo trataba y el excesivo jornal que tomaba de su trabajo, declarando que no se le daba el menor descanso ni de día ni de noche,

"...siendo obligado en invierno y verano a andar por las calles muchísimas veces hasta las doce de ellas de casa en casa afeitando, y por la mañana hasta la una, levantándome en todo tiempo antes de venir el día, desnudo sin la ropa precisa de abrigo, aún en lo rígido del invierno".<sup>411</sup>

Y por si esto fuera poco para probar la sevicia, el esclavo Manuel denuncia que Francisco Ruiz Quevedo por orden de su amo lo encerró "...en un cuarto húmedo, inhabitable, atado a un madero con una cadena, azotado cruelmente, y privándome del alimento". Estos hechos, fueron reconocidos por López de Heredia, pero disimulados "...con un disfraz despreciable, pues los azotes los nombra papiroles, y la dura prisión y terrible castigo correcciones paternas".<sup>412</sup>

En otro caso singular, acontecido en 1764, la esclava Martina Esquivel demandó a Ramón Esquivel, hijo y albacea testamentario de Doña Lorenza Ocampo Saavedra, viuda del Alférez Bartolomé Esquivel, le pagase los 20 años de servicio que en vida de su madre practicó.<sup>413</sup> Alegaba la esclava Martina,<sup>414</sup> que dicha difunta Doña Lorenza

"...no me hubo porque la justicia me entregase a ella, sino al contrario por que ella me pidió a la justicia con la denominación de nieta, y a no ser así le hubiera obligado a mi madrina para que me entregase. Lo que podré a V.S. asegurar es que hasta ahora no he oído decir que para coger a una chinita, cualquier persona lo honeste con decir que es su parienta, y que como tal la dé a conocer a sus propios hijos".<sup>415</sup>

En aquel tiempo, según la esclava Martina,

"...Doña Lorenza no tenía más criada que yo para la calle y para las ocupaciones que tenía adentro dándome la crianza para [la] que me había quitado del poder de mi madrina, en que vendiese todos los días pasteles, y empanadas, y todas las tardes empanaditas, cosinando y labando para afuera los días que no salía a la calle".<sup>416</sup>

Al argumento del abogado de la demandada, de que entre Doña Lorenza y su esclava Martina "...no hubo concierto, salario ni escritura para en su fuerza cobrar dicho servicio",<sup>417</sup> la esclava Martina le pedía al Juez que reflexionara si ella podía haber tenido acaso

"...advertencia para pedir dicha escritura o contrata quando desde seis años me llevó a su casa, y aunque después de estar allí viese desnuda y sirviendo es claro que por tenerla como abuela y madre de mi padre no me atrevería a concertarme",<sup>418</sup>

Esta inadvertencia, agregaba Martina, también le habría sucedido con su propio padre, en el caso en que este

"...me hubiese quitado....aduciendo para esto que yo era su hija, es evidente que conociéndole por tal no le pidiese la paga de mi servicio, pues es derecho establecido por el mismo Dios en el cuarto precepto del decálogo: honora Patrem, et matrem".<sup>419</sup>

Pero si después mi padre, alegaba Martina, "...me negase, que no era su hija, y que por tal no me reconocía es evidente le cobrase mi trabajo, del cual se había aprovechado con la denominación de hija".<sup>420</sup> Por vivir en la fe de que la finada Lorenza Ocampo me había tenido por nieta, Martina sostenía tener "...derecho a cobrar mi trabajo y por consiguiente a demandarla por el engaño con que me había entretenido".<sup>421</sup> Martina se preguntaba si la buena fe de la difunta

"...consistió en criar con la denominación de nieta a fin de servirse de mí todo el tiempo de 20 años? No se que me responda la parte contraria sino es que salga con la pariedad del irracional a quien se quiere y se estima quanto más aún racional; yo bien sé y no es ageno de duda, que si hubiera de cuidar del mantenimiento y vestuario con los irracionales menos estimación haría de ellos aún la parte contraria, que los trae a consideración".<sup>422</sup>

Por lo general, a medida que los esclavos envejecían se veían en dificultades de abonar a sus amos los jornales acostumbrados. El pago de estos jornales sufría asimismo de oscilaciones estacionales, pues en los meses de invierno, al arreciar las enfermedades propias de dicha estación, los esclavos solían mermar sus tributos o contribuciones. Frente a las dificultades que la edad y las enfermedades de los esclavos generaban, los amos preferían optar por recluir a estos esclavos en panaderías, lugares donde se los forzaba al trabajo y cuyos dueños se responsabilizaban por remesar con puntualidad los jornales a los amos respectivos. Este fue el caso del negro Bernardo, una vez que falleció su amo Saturnino Saraza. Su viuda, Doña Juana Josefa Tirado, la cual quedó de albacea,

"...no atendiendo al prolongado tiempo de 25 años en que fielmente he servido pues en ellos no he faltado con mis jornales, ahora por no poderlo practicar con la actividad que en aquellos tiempos, pues ya por el peso de mi edad me hacen mucha

impresión los rigores del invierno por cuyo motivo he hecho algunas faltas con los jornales, por lo que se me amenaza que me pondrán en una panadería de donde puedan percibir mensualmente sin contingencia sus jornales y esto con la mayor indolencia".<sup>423</sup>

Las actitudes que los amos incriminaban como delito, bajo diversas figuras jurídicas (robo, hurto, latrocinio, receptación) y estigmas sociales registrados notarialmente (ladrón, ratero, huidizo, bandido, etc.) habrían constituido una fase clave en el ciclo de vida del esclavo y una forma de resistencia a la creciente comercialización de la mano de obra esclava, lo cual contribuyó hondamente a la formación de la conciencia de este grupo social. Estos estigmas debían estar consignados en la escritura de cambio de dominio por cuanto de descubrirse una tacha o vicio con posterioridad a la venta, el contrato respectivo era susceptible de caer en la figura de la redhibitoria. Entre los estigmas más comúnmente atribuidos a las esclavas mujeres figuraba el de enamoradiza. Dicho estigma se daba con mayor frecuencia entre las esclavas mulatas. Francisco Xavier Conget,<sup>424</sup> un conocido escribano de Buenos Aires, en su litigio con su primo el pardo libre Víctor de Aguirre sobre el derecho al tanto o tanteo,<sup>425</sup> en las casas de sus abuelos,<sup>426</sup> negaba en 1745 que este fuera hijo de su tío Mateo de Aguirre "...pues es constante en esta ciudad que las mulatas viven por lo general de trato ilícito con diferentes galanes".<sup>427</sup> En forma semejante, el Maestro albañil Juan de los Santos, concluía en 1762, en términos indignados e irrespetuosos por demás, que la sentencia negativa recaída en los autos sobre salarios en las obras de reparación de la Plaza de la Colonia solo se podía atribuir a la circunstancia de que "...las mulatas briosas y de buen talle tienen tanta aceptación que cuando no logran trastornar al Juez, consiguen y facilitan invertir el orden del proceder judicial".<sup>428</sup> Pero la connotación de enamoradiza en las escrituras de compraventa de esclavas no siempre era tenido por defecto para que diera mérito a las acciones redhibitorias. Joseph Bermúdez,<sup>429</sup> el vendedor de una esclava acusada de tal por el comprador Mariano Echaburu, exclamaba en 1784 en las acciones redhibitorias iniciadas por este último, que "...el amor es una pasión inherente a nuestra naturaleza, que comprende no sólo a los esclavos sino a todo viviente".<sup>430</sup> Para que esta calificación connotase defecto capaz de fundar redhibitoria Bermúdez sostenía que era necesario que la esclava tuviera por costumbre la fuga motivada en el amor.

Por otro lado, estos estigmas estaban destinados a ejercer también un control social individual en cada esclavo más propios de una estructura patriarcal o señorial que de una mera sociedad esclavista. Apparently, el control social que los amos ejercían sobre sus esclavas era mas estricto cuando en el pueblo o villa había plaza o zócalo donde los amos pudieran medirles el tiempo que tardaban en hilar o tejer. En Corrientes, de donde provenía la negra María del Rosario, Ramírez le contaba a la compradora Usín que como no hay Plaza "...es indispensable anden todo el día en la calle, y por esta razón no podemos los amos medirles el tiempo".<sup>431</sup>

El tener a las esclavas convenientemente amancebadas era considerado como el mejor antídoto contra la indisciplina y el desorden individual. Mas no todos los amos se preocupaban porque sus esclavos llevaran vida maridable. En el caso litigado en 1784 entre Bermúdez y Echaburu, acerca de una esclava, manifestaba el primero "...que si Don Mariano hubiese procurado casarla como lo prometió según lo testifica el mismo Cáseres, ella jamás se hubiera huido".<sup>432</sup> En otro caso ocurrido veinte años después, las recomendaciones de un amo correntino que vende su esclava ilustran las preocupaciones

sociales de un provinciano aparentemente ajenas al *modus vivendi* vigente en Buenos Aires. En efecto, José Ramírez exclamaba en 1804:

"...Dios le de a ella Amos que la sepan tener midiendo el tiempo, las horas y momentos, y la tengan en reclusión para que se junte con su marido, y haga vida con él, que en este caso será la negra singular de tesón en el trabajo, y vivirá su espíritu con tranquilidad, lo que no aora que vive desasosegada, cabilando, noche y día la sutileza de la iniquidad, como experimentará Vm. en ella, que parece un caballo pajarero como anda, sospechando lo que se le pone en el majín".<sup>433</sup>

## **F-VII La manumisión esclava.**

Con los jornales los esclavos acumulaban un peculio que les permitía a algunos lograr su propio rescate o manumisión, o el de sus parientes o allegados. La Tabla G-III revela la nómina de 385 rescatadores de esclavos, donde 133 casos delatan la identidad étnica, y en muchos casos los parientes directos de los esclavos manumitidos. La asociación entre rescatador y etnia era muy estrecha, detallándose en 133 casos la identidad étnica de los mismos: 69 morenos (negros) o el 51%, 54 pardos o mulatos o el 40%, y 10 indios o el 1%. La casi totalidad de los rescatadores pardos y morenos eran libres. No obstante su condición de libres, dichos rescatadores debían acreditar una habilitación, la cual debían obtener de un Juez competente.<sup>434</sup>

La relación de parentesco entre rescatadores y manumitidos era también muy fluida, detallándose en 155 casos el tipo de parentesco que los unía: 74 maridos o el 50%, 33 padres o el 21%, 28 madres o el 18%, y 6 hermanos, 4 madrinas, 3 abuelos, 3 cuñados, 2 tíos y 2 novios. En algunos casos los padres que rescataban a sus hijos naturales preferían mantener el anonimato.<sup>435</sup> En otros casos la manumisión era el instrumento por el cual se reconocía la paternidad natural.<sup>436</sup> No siempre la manumisión era absoluta, pues en muchos casos venía condicionada. Estas condiciones eran de todo tipo y color. En algunos casos se trataban de ventajas materiales. El negro José Ramírez, fue manumitido en 1786 por Domingo Belgrano Pérez,

"...con la condición de que a de acompañar y servir como tal esclavo a mi hijo José Gregorio Pérez, que se halla próximo a viajar al Perú con mi dependiente Pedro Antonio de Zavalía".<sup>437</sup>

El mulato José Domingo Sotelo, de 14 años, hijo de Damacia, fué manumitido en 1808 por María Gertrudis Tejerina

"...con la condición que siga dándole los \$6 cada mes que gana de soldado a donde le a puesto y en saliendo de dicho servicio le ha de contribuir según y conforme pueda adquirir con su corto trabajo".<sup>438</sup>

En otros casos las condiciones eran más carnales. La mulata Antonina, de 36 años, fue manumitida en 1809 por Martín de Sarratea en \$380 "...que me entregó en mayo de 1799 el pardo Juan José Ávalos con la condición que había de contraer matrimonio con él".<sup>439</sup>

En muchos casos la manumisión era posible debido a la intercesión del préstamo usurario de un tercero. La Tabla G-IV enumera una pequeña muestra de 27 operaciones de préstamo destinadas a manumitir esclavos, registrados en Buenos Aires, alfabetizadas por

el nombre del acreedor. De las 27 operaciones, solo dos repiten el acreedor, que lo fueron el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada y Doña María del Pilar Rodríguez Flores.<sup>440</sup> En muchos casos el acreedor o prestamista era el mismo que lo conchababa, y la suma adeudada era reembolsada con los mismos jornales que el deudor ganaba. El pardo Gregorio de Rojas y sus hijos Blas Mateo Miguel y Gregorio de Roxas, quienes ganaban de jornal \$5 mensuales cada uno, se endeudaron en 1750 con el Hospital Betlemítico en \$250, equivalentes a diez meses de trabajo, suma que se obligaron a "...pagar con nuestro trabajo personal".<sup>441</sup> Basilio Baldés y Alberto Quevedo, el primero de oficio sangrador, barbero y amolador, para redimirse de la esclavitud se endeudaron en 1772 con Andrés Ros, en \$500, que "...hemos de contribuir con los jornales que tenga a bien imponerme".<sup>442</sup> El pardo José Mariano Valle, vaquero contratado a \$11 mensuales, y su mujer Joaquina Navarrijo, se endeudaron en 1806 con José Antonio Pereira de Melo, vecino del Espinillo, en \$286

"...para libertarse de su amo Francisco Xavier Alonso y satisfacer dicha cantidad con su servicio personal en la faena que tiene en su estancia en la otra banda a donde a de pasar con el sueldo de \$11 cada mes".<sup>443</sup>

El moreno Antonio Vezo, esclavo de Antonio Isla, se endeudó en 1808 con Lorenzo Balaró y Cía., dueño del Café llamado de Monserrat, en \$300 con el fin de libertarse, y con el compromiso de cancelar la deuda "...con mi servicio personal durante cuatro años en el Ramo de confitería sin reportar salario alguno por mi dicho trabajo".<sup>444</sup> El pardo libre Mariano Arias, de oficio panadero, se endeudó en 1810 con el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada en \$280 a re-embolsar en tres años.<sup>445</sup> Y en igual año el pardo Juan Vicente se endeudó con el mismo Moreno de Tejada en \$300 con el compromiso de re-embolsar dicha suma "...con su trabajo personal en la casa panadería trabajando 30 meses".<sup>446</sup> Por último, la negra Rita, de 60 años, que servía a razón de \$4 mensuales, fue manumitida en 1811, en \$154, equivalentes a 38 meses de trabajo, que le prestó la santafesina Mercedes Correa de Melo,

"...bajo la condición de que ella y su hija Benedicta de estado libre habían de ir a servirle abonándole a dicha Señora \$4 cada mes hasta tanto quedase cubierta la deuda y en caso de fallecer la Rita había de ser de cuenta de Benedicta su hija el servir hasta completar dicho pago".<sup>447</sup>

#### **F-VIII Los plazos de amortización en las manumisiones.**

Los plazos de amortización con que los acreedores se resarcían de las sumas adeudadas por los esclavos artesanos variaba con el precio tasado al esclavo y el monto de los jornales diarios ganados por éste. Pablo José Lorenze, oficial herrero, quien ganaba siete reales diarios o \$10 mensuales, una de las rentabilidades más altas en plaza, se endeudó en 1801 en \$215, equivalentes a 21 meses de trabajo, con el maestro herrero Agustín Mosquera, para libertar a la parda María Josefa, suma que se obligaba "...a ir satisfaciendo de los jornales que dicho Agustín me a de dar", y que pudo cancelar sólo seis años después, en octubre de 1807, cuatro años y cuatro meses más tarde que lo previsto si hubiera cancelado la deuda con el 100% de sus jornales.<sup>448</sup> El moreno libre Antonio Brin, de oficio aserrador, quien ganaba de jornal a razón de 8 reales diarios, se endeudó en 1801 con el vasco Juan Bautista Zelaya, en \$360, equivalentes a un año calendario de trabajo, para con dicho importe libertar a su mujer Tomasa, esclava que era de María Magdalena Torres, descontándole para ello lo "...que me quede libre [después de pagar los vicios de

yerba y tabaco] de un peso diario que me abona de jornal".<sup>449</sup> Y el negro libre José Gómez, de oficio sastre, debe haber ganado de jornales más de \$11 mensuales, si tenemos en cuenta que en enero de 1810 canceló una deuda de \$269, contraída dos años antes, en 1808, resto de \$300 que debía al gallego Francisco Pombo, por "...pagar mi libertad otorgada en diciembre de 1807".<sup>450</sup>

El reembolso era por lo general establecido en cuotas, pagaderas mensualmente con el trabajo de su oficio. El carpintero Pedro Regalado Chene se endeudó en 1801 en \$300 con Juan Antonio Moris para libertar a su mujer María Pascuala, esclava de José Ignacio Uriarte, "...dándole mensualmente lo que pudiese adquirir con mi oficio de carpintero".<sup>451</sup> El moreno libre Pedro Pizarro y su mujer María se endeudaron en 1802 con Francisco Marín y O'Brian en \$200, comprometiéndose a pagar \$10 cada mes.<sup>452</sup> El negro libre Joaquín Correa se endeudó en 1804 en \$284 con su patrón Juan Ignacio Ezcurra, para con dicha suma obtener su libertad, pagando "...en cada mes lo que gane con mis jornales".<sup>453</sup>

En caso de faltar el liberto al reembolso debido se establecía por cláusula la obligación de trabajar para el acreedor hasta cancelar la deuda. El negro Manuel de la Cruz, de oficio panadero, fué manumitido en 1801 por el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada, en \$350 que obtuvo en préstamo de Pedro González Cortina, bajo la condición de que

"...se lo ha de reintegrar con el que ganare mensualmente en su oficio de panadería y si por su culpa no lo berificase bolberá otra vez a la servidumbre que tenía quedando esclavo del dicho Pedro González Cortina por la misma cantidad sin que pueda ser vendido por mayor cantidad".<sup>454</sup>

La morena libre María Lucrecia de la Paz se endeudó en 1805 con María del Pilar Rodríguez Flores, en \$65 para obtener su libertad y en "...el interín no se los satisfaga integralmente es condición de que le a de servir como si fuera efectivamente esclava".<sup>455</sup> La parda libre Juana Echevarría se endeudó en 1805 con el Dr. Mariano Moreno en \$140 para la manumisión de su hijo Faustino, de 6 a 7 años, estableciendo que si cumplido el plazo de dos años

"...no hiciese el pago confiese y declare que está convenida con el dicho acreedor en que por la misma cantidad haya de tener facultad dicho Doctor en venderlo al dicho muchacho o quedarse con él si le acomodare".<sup>456</sup>

## **F-IX Las fronteras raciales.**

Por último, con motivo del clima igualitario generado por la ola revolucionaria de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, podemos aseverar que las fronteras raciales sufrieron una esporádica erosión,<sup>457</sup> similar a las que ocurrían durante los Carnavales Latino-medievales y las Saturnalias que se celebraban en la antigüedad Romana,<sup>458</sup> y que a juzgar por el libreto de Tomás Gutiérrez Alea, acerca de la apasionante película cubana *La Última Cena*, acontecían también en la Cuba dieciochesca.<sup>459</sup> En efecto, cuando el más luego General Manuel Corvalán,<sup>460</sup> estuvo al frente del Fuerte de San Carlos, en Mendoza, entre 1810 y 1812, Bernardo, esclavo de Francisco Aragón, inculpatado en un levantamiento de esclavos, manifestó en julio de 1812, que el Coronel le mandó

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía porqué siendo Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que sin duda por esto habrán levantado el falso testimonio de que Don Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los esclavos".<sup>461</sup>

Asimismo, en 1825, cuando con motivo de la batalla de Ayacucho, el Gobernador de Salta General Juan Antonio Álvarez de Arenales,<sup>462</sup> celebró el triunfo definitivo de la Independencia, ordenó que los festejos se hicieran

"...corriendo sobre el mismo mantel, así los más engreídos y de rango, que formaban en su partido, como los señalados por distinguidos de la plebe, deseando que en los regocijos se unieran todos los hijos de la república, sin distinción de sangre".<sup>463</sup>

Luego, con la restauración provocada por los regímenes despótico-confederados, dichas fronteras raciales volvieron a su antiguo cauce.<sup>464</sup>

La prohibición de arribo que padecía la mano de obra libre extranjera, también contribuía fuertemente a este encarecimiento. Al ser el capital comercial monopolista, distribuidor de producción de mano de obra esclava creada en África o Brasil, mal podían tener sus beneficiarios interés alguno en el desarrollo de la inmigración extranjera. Este encarecimiento, reducía los beneficios y retardaba la formación de capital al dilatar la velocidad de rotación del capital circulante. El alto precio que tenía que pagar quien alquilaba mano de obra esclava, obedecía a la necesidad de tener que abonarle al dueño del esclavo, una renta que le permitiera a éste, cancelar el interés del precio de compra más una alta cuota de amortización por la brevedad del ciclo de vida del esclavo. Por otro lado, la dificultad del propietario esclavista o feudal, en convertirse en un explotador capitalista, era debida a la esterilización de dinero-mercancía en capital fijo; a la escasez crónica de mercancía-dinero o iliquidez, con el cual invertir en los otros insumos necesarios para valorizar la producción; y a la extrema lentitud de rotación del capital circulante, que acentuaba aún mas las restricciones económicas del mercado laboral.

Además, la esclavitud actuaba como una de las condiciones restrictivas que impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.<sup>465</sup> Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.<sup>466</sup> Pero esto no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces

impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud estipendiaria.

## **Capítulo I-B-7: Subalternización de los originarios como fuerza de trabajo colonial.**

### **Índice**

- G-I Migración de originarios.
- G-II Pampa bonaerense como región de frontera.
- G-III Descomposición de los pueblos originarios.
- G-IV Emancipación de los originarios encomendados.
- G-V Indios yanaconas o libres.
- G-VI Competencia por los recursos laborales.
- G-VII Peonaje por deudas.
- G-VIII Leva o reclutamiento de reclusos y prisioneros.
- G-IX Fuga de las encomiendas.

### **G-I La migración de originarios.**

La migración indígena a principios del siglo XVII es probablemente lo más importante para entender el proceso de formación de la clase trabajadora criolla en la Argentina, por haber sido responsable de establecer el más relevante precedente para la inmigración de las minorías oprimidas (la población marginal) a fines del siglo diecinueve.<sup>467</sup> A la luz de este déficit historiográfico y a fin de reconsiderar el impacto económico del capital comercial en el sistema de encomienda, voy a analizar aquí la forma en que el capital comercial ayudó a la descomposición de las encomiendas de las provincias interiores, así como la subsecuente migración de una sobrepoblación relativa hacia Buenos Aires. Este análisis es realizado estudiando las relaciones sociales de producción prevalecientes en Buenos Aires: los incentivos salariales, el peonaje por deudas, el salario en especie y la aparcería. Por otra parte, este estudio será realizado utilizando la identificación de la localización indígena de origen y la distribución del trabajo indígena entre las encomiendas de origen y entre los contratantes.

### **G-II La pampa bonaerense como región de frontera.**

La pampa bonaerense era considerada durante los siglos diecisiete, dieciocho y la primera mitad del diecinueve, como una región de frontera y, como tal, sus pobladores indígenas, de acuerdo a las Leyes de Indias, estaban libres de obligaciones tributarias y de servicio personal. Así como la mano de obra forzada pampeana era escasa e inconstante, también lo era la fuerza de trabajo que de estos indígenas se esperaba que contribuyeran. A diferencia de la mano de obra indígena de las encomiendas del interior y del litoral, la indiada Pampa y Ranquel no conformó Cabildo alguno y no pudo ser tampoco repartida ni confiscada mediante tributo alguno. De forma que la fuerza de trabajo que los indios pampas no proveían debía ser traída de las provincias norteañas. Pero, como la tarea de canalizar aquellos indígenas desde el norte hasta el sur no podía realizarse por medio del

repartimiento por el perjuicio que podía haberle infligido a los encomenderos porteños, la elite dominante recurrió finalmente al sistema salarial.

### **G-III La descomposición de los pueblos originarios.**

Esta articulación del hinterland porteño, la descomposición de los pueblos indígenas y la emancipación de los indios encomendados de sus medios de producción así como del dominio del encomendero, estaban relacionados con la localización original de donde el excedente de trabajo indígena había sido extraído. La dinámica violenta impuesta por la conquista española generaba nuevas estructuras económicas entre las que se destacaba la economía agro-exportadora (vaquerías y ganadería en estancias). La última reverberó drásticamente en las estructuras indígenas del interior, absorbiendo una porción relevante del trabajo excedente existente. Pero cuando una economía agro-exportadora como la de la provincia de Córdoba capitulaba (1606) su mano de obra no tenía otra opción que fugarse.

La separación de los indígenas cordobeses de sus medios de producción estaba íntimamente relacionada con la promulgación de la Real Cédula de Ampudia, en 1606. A través de la destrucción de la industria harinera cordobesa, la corona expandía indirectamente el excedente de mano de obra forzada hacia Buenos Aires. El crecimiento de la esclavitud expandió la fuerza de trabajo disponible a varios empresarios no encomenderos, pero no alivió la necesidad de trabajo extra. Para incrementar la fuerza de trabajo durante el tiempo de la cosecha, un empresario colonial no encomendero en Buenos Aires a menudo contrataba indígenas por períodos cortos de tiempo. De igual manera, un creciente sector de encomenderos de las provincias del interior, no tenía más alternativa que alquilar sus indígenas a fin de hacer frente a su desesperada necesidad de efectivo. Por la misma razón, un creciente sector de empresarios no encomenderos de Buenos Aires sin acceso a indios de encomienda, no tenía más alternativa que ofrecer salarios a los indígenas y un elevado alquiler a los encomenderos, a fin de estimular a los indígenas a trabajar para ellos. Los empresarios no encomenderos preferían usar indios antes que esclavos, estimulando de esta manera la articulación de Buenos Aires con su propio hinterland. Cuando el tipo de producción rural era esencialmente intensivo: como era el caso de la cría de ganado mular, los terratenientes encontraban más beneficioso, primero promover la contratación de más indígenas asalariados, y segundo, desalentar la compra de esclavos. La naturaleza intensiva en tierras de la cría de ganado, o en otras palabras, su elevado costo marginal de sustitución asalariado-esclavo, empujó a los terratenientes a expandir sus intereses pecuarios esencialmente mediante la contratación de indígenas asalariados.

De acuerdo a esta estrategia laboral, mientras la mano de obra indígena se convertía en rentable la esclava permaneció muy costosa. Mientras que el precio de los esclavos se mantenía elevado, el capital que los terratenientes tenían que gastar mensualmente a fin de contratar indígenas se tornaba casi irrelevante. El trabajo indígena, a diferencia del esclavo, no significaba un desembolso monetario que podía ser enteramente perdido si el trabajador se fugaba o enfermaba y moría. El reemplazo del trabajo indígena con nuevos indios costaba a los empresarios no encomenderos mucho menos que un esclavo. Por ejemplo, como resultado de la arribada de tropas milicianas desde Tucumán, Santa Fe y Corrientes para defender Buenos Aires contra amenazas foráneas (1594, 1616, 1625, y 1645) una gran masa de mano de obra indígena fue provista

al mercado una vez que la amenaza desapareció.<sup>468</sup> De aquí porque la mayoría de los indios encomendados alquilados en Buenos Aires procedían de las provincias interiores.

#### **G-IV La emancipación de los originarios encomendados.**

En las provincias del interior los encomenderos desarrollaron una estructura agraria caracterizada por el modo de producción campesino, la explotación indirecta por intermediarios de poder (mayordomos de encomienda o pobleros, curas doctrineros, mercaderes, etc.) y las comunidades corporativas campesinas que exhibían algo de vigor y proteccionismo.<sup>469</sup> Antes que el capital comercial tuviera éxito en penetrar en las provincias del interior, la estructura casi feudal dominante en el área impidió el desarrollo del comercio y el transporte de larga distancia. Esta situación existía porque los encomenderos negaban o restringían el flujo de mano de obra indígena, a través del entrelazamiento de los indios a la encomienda y al obraje, y haciendo esta oferta de mano de obra dependiente de la autorización del encomendero y del pago de un alquiler. Es necesario recordar que el encomendero dominaba su jurisdicción con una autoridad mucho más absoluta que la gozada por el virrey sobre todo el virreinato o el gobernador sobre toda la gobernación. El era el juez, el jefe de policía, el carcelero, el recaudador de impuestos, e incluso elegía a los clérigos en la iglesia. El poder político concentrado en las manos del encomendero lo habilitaba a extraer un tributo (la renta absoluta) de los indígenas dentro de sus dominios en la forma de trabajo, en pagos monetarios o en especie. Luego que el capital comercial tuviera éxito en la penetración de las provincias del interior, los encomenderos intercambiaban periódicamente sus indígenas por plata del Alto Perú y un ingreso equivalente en mercadería europea de Buenos Aires. Con pocas excepciones, cada uno de los conciertos notariales (de cada indígena alquilado) en Buenos Aires revela la localidad de origen. Conocemos a partir de dicha información que el 97% de la población indígena alquilada en Buenos Aires sobre una base salarial venía del interior (55% del norte; 30% del Litoral; y 15% del Oeste). Solo el 3% de los indios alquilados eran de Buenos Aires mismo.<sup>470</sup> Mi tesis doctoral muestra una lista alfabética de los encomenderos de Buenos Aires que alquilaban dichos indios sobre una base salarial.<sup>471</sup>

Si al intercambiar sus indígenas por mercadería europea, los encomenderos consumaron la separación de aquellos indígenas de sus medios de producción, podemos concluir que tanto los encomenderos, como los mercaderes de larga distancia y los terratenientes, sellaron una alianza, según la cual los mercaderes tenían la hegemonía, subordinando los salarios indígenas al dominio de la tasa de interés comercial. Los salarios en un período de transición del feudalismo al capitalismo no eran ni un ingreso feudal, como lo postuló la izquierda liberal, ni eran un ingreso capitalista, como propuso la nueva izquierda, sino un tipo intermedio de ingreso, dominado por la tasa de interés del capital comercial.

Los indígenas de las provincias interiores que trabajaban por un salario en Buenos Aires eran esencialmente indígenas que eran alquilados por empresarios no encomenderos por una renta de más del doble del monto del tributo que aquellos indios tenían que abonar.<sup>472</sup> El hecho que los indígenas venidos del interior eran conchabados con contratos donde el nombre del encomendero y la provincia de origen estaban detallados, me convenció de la naturaleza tributaria de la mayoría de aquellos indios. Además, el hecho que pocas veces los contratos mencionaban la característica de indios yanaconas o la

circunstancia específica que los indios estaban "libres de tributo", confirma la naturaleza tributaria de la mayoría de aquellos indios. Así, el no encomendero que contrataba a estos indígenas estaba obligado a pagar la renta, incluyendo el tributo indígena al encomendero y el salario al indígena. Por lo tanto, los indígenas habían de residir donde quisieran en tanto pagaran el tributo. Los esfuerzos de los encomenderos por forzar a los indios a regresar a sus comunidades tuvo poca efectividad en tanto y en cuanto sus nuevos amos, los empleadores no encomenderos, pagaran el tributo.

#### **G-V Los originarios yanaconas o libres.**

El término yanacona, que al principio fue aplicado a los indios peruanos y chilenos, fue utilizado en Buenos Aires para describir a una minoría de "indios libres", o indios que ya no debían obediencia a ningún encomendero y habían ingresado, a través de contratos salariales, al servicio de amos españoles o criollos.<sup>473</sup> Además, los indios de encomienda no eran yanaconas sino un tipo especial de asalariados. En efecto, el concertaje (contrato formal de trabajo asalariado) era un contrato colectivo entre un corregidor, una autoridad designada políticamente para obligar a los indígenas locales a cumplir el concierto (contrato), y el empleador no encomendero, que pagaba un salario estipulado a través de la autoridad real. Los salarios de aquellos indígenas que pertenecían a las encomiendas locales eran pagados a las Cajas de Comunidad, controladas por el corregidor, sirviendo, aunque no siempre, como una reserva que contribuía a cubrir el tributo del pueblo indígena como también al mantenimiento del grupo de parentesco.<sup>474</sup> Pero los Corregidores no siempre cumplían con sus responsabilidades. En 1652, por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires requirió al Corregidor que no convirtiera las Cajas de Comunidad en espacios privatizados de capital.<sup>475</sup>

En nuestra investigación preliminar sobre los índices de los registros notariales localizamos un total de 1.046 conciertos laborales registrados entre 1608 y 1654. A partir de esta cifra total hemos podido encontrar en los protocolos notariales, gracias a una mas detallada investigación, solo 1.026 conciertos laborales comprendiendo a 1.098 indios. En el periodo anterior a 1642 la investigación abarcaba 927 contratos comprendiendo a 967 indios. De los mismos hemos localizado el origen geográfico de solo 681 indios. Mas aun, de este numero total de indios hemos descubierto 48 indios que renovaron su contrato dos veces, 2 indios que lo hicieron tres veces, y un indio que renovó su contrato cuatro veces. En otras palabras, el número de indios alquilados con un conocido origen geográfico quedaron reducidos a medio centenar, alcanzando a un total de 919 indios. El procedimiento seguido para identificar la renovada presencia de campesinos indígenas y trabajadores de carretas en el mercado laboral de Buenos Aires ha sido de alguna manera aleatorio. La principal dificultad para su identificación yacía en el hecho que los indios, como los esclavos negros, no llevaban apellido. Estos últimos eran reemplazados con los nombres de los encomenderos a quienes cada indio tributaba. En nuestra investigación comenzamos con la presunción metodológica que dos indios del mismo origen geográfico, viniendo de la misma encomienda, que llevaban el mismo nombre, y que fueron alquilados en años consecutivos, con salarios equivalentes por el mismo contratista, eran necesariamente la misma persona.

#### **G-VI La competencia por los recursos laborales.**

La presencia de trabajo indígena en chacras, medios de transporte y artesanías en un centro económico periférico como el de Buenos Aires, generaba entre los dueños de

chacra, propietarios de carretas, y maestros artesanos, una amplia competencia por los recursos laborales. Aunque los artesanos asalariados eran fácilmente identificables, los asalariados en chacras y transporte de carretas eran difíciles de distinguir. Existen dos métodos disponibles para distinguir aquellos indígenas asalariados empleados en el servicio de transporte de aquellos empleados en tareas agrarias. La forma más fácil de encontrar un contrato donde el indio empleado trabajara en el servicio de transporte era a través de la extensión del período de contratación. Casi todos aquellos indios contratados por mes fueron empleados en el negocio de carretas. El otro método disponible para realizar esta distinción era identificando las actividades económicas de aquellos empresarios que contrataban a estos indios. Si el contratista era un dueño de chacra, los indios contratados por él serían más probablemente empleados en la siembra y la cosecha. Por otra parte, si el contratante era un propietario de carretas, los indios contratados por él serían más probablemente empleados en el negocio del transporte. De acuerdo a un detallado análisis de esos contratos encontré que de los 1.098 indios alquilados por empresarios no-encomenderos en Buenos Aires, 118 indios (10.7%) trabajaban como artesanos urbanos asalariados, 316 indios (28.7%) trabajaron como arrieros y peones de carretas, y 664 indios (60.5%) trabajaron como trabajadores anuales en chacras y estancias.<sup>476</sup> Sin embargo, hubo chacareros que aparte de alquilar asalariados para sembrar trigo y maíz, alquilaban aprendices para desempeñar aquellos oficios necesarios en cualquier chacra. También, hubo dueños de estancia que aparte de alquilar asalariados para trabajar en sus estancias, alquilaban arrieros para conducir su ganado al mercado. El trabajo estacional libre en el Buenos Aires del siglo XVII constituía un sector muy heterogéneo, alquilados para muy específicas tareas de corta duración, algunas de ellas tales como la yerra, la castración, etc., de gran responsabilidad y especificidad, y algunos otros como la caza de ganado salvaje y los rodeos de hacienda mansa de menor responsabilidad y especificidad.

Este detallado estudio del mercado de trabajo indígena de Buenos Aires, nos permite también admitir la existencia de un mercado de trabajo elástico en el Buenos Aires de principios de siglo diecisiete. La existencia de una repentina demanda de mercadería extranjera, a causa de un profundo incremento en el contrabando de plata, combinada con una escasez crónica de trabajo acelerada por epidemias periódicas, generaba una amplia competencia por el recurso trabajo que finalmente logró reflejarse en los niveles salariales. A pesar del hecho que la competencia por los recursos laborales hubiera sido mucho más elevada si los empresarios portugueses no hubieran sido excluidos de la competencia (lo que los empujó a depender exclusivamente del mercado de esclavos), los salarios indígenas en el Buenos Aires del siglo XVII alcanzaron las cotas más altas.<sup>477</sup> Luego de la epidemia que golpeó a Buenos Aires a comienzos de la década de 1620, Andrés, un indio procedente de Santiago del Estero, logró elevar su salario de \$3 mensuales en 1622 a \$3 1/2 en 1623, o un 17% de incremento.<sup>478</sup> En forma similar, Hernando un indio también procedente de Santiago del Estero, experimentó un ingreso salarial del 25%, de \$2 2/3 mensuales en 1622 a \$3 1/3 en 1623, o un 60% de incremento.<sup>479</sup> Mas luego, cuando una plaga golpeó a Buenos Aires en 1652 aconteció la inflación mas fuerte del siglo. Esta inflación salarial puede haber sido también causada por el repentino incremento en la producción de plata en 1648 y 1649 así como por los graves fraudes monetarios.<sup>480</sup> Por ejemplo, Bartolo, un indio de Corrientes, experimentó un incremento salarial del 60%, de \$2 1/10 mensuales en 1649 a \$3 1/3 en 1653.<sup>481</sup> De igual forma, Pedro, un indio de Córdoba, experimentó un incremento salarial del 50%, de \$4 mensuales en 1649 a \$6 en 1653.<sup>482</sup> Un incremento en salarios monetarios elevo los precios relativos de los bienes intensivos en mano de obra y rebajo los precios relativos de los bienes intensivos en tierra, su impacto era el de elevar el

costo de producir trigo mas que el de producir carne y por tanto rebajar la rentabilidad relativa de la producción triguera, y estimular la producción de carne. La composición de la producción, entonces, oscilo a favor de la carne, un bien intensivo en tierra. En 1621, cuando la epidemia golpeo a Buenos Aires, el precio del trigo se incremento ocho veces, de 8 reales cada fanega en tiempos regulares a 64 reales luego de la epidemia, y el precio del maíz se incremento siete veces, de 12 reales a 80 reales.<sup>483</sup>

Sin embargo, de cuando en cuando, el estado colonial, a través de la legislación capitular, puso coercitivamente fin a los incrementos salariales coercitivamente ordenando un salario justo. Durante la década de 1630, el salario promedio para el trabajo agrícola rondaba alrededor de los \$30 anuales. En forma similar, el salario promedio para arrieros y peones de carreta rondo entre \$3 y \$4 mensuales. En Diciembre de 1673, el Cabildo de Buenos Aires ordeno que a los indios Pampas les fuera pagado un salario mensual de \$4 1/2, o \$54 anuales como máximo.<sup>484</sup> No obstante, cuando los indios Calchaquies procedentes de Salta fueron introducidos en Buenos Aires en 1680, el Cabildo redujo su salario el 55%, de 4 1/2 reales a 2 reales diarios.<sup>485</sup> Los incrementos de los salarios indígenas de una porción significativa de los indios tributarios del interior y de Buenos Aires estaban generados por la necesidad de transportar esclavos a Chile y el Alto Perú durante la primera mitad del siglo XVII. Considerando que en 1622 y 1623 el 39% de los conciertos indígenas, o 273 sobre 708, fueron firmados por un monto total de \$8.190 y que en esos dos años las exportaciones de harina y tasajo montaron solo \$8.800, parecería que la fuerza de trabajo indígena del interior estaba mayoritariamente envuelta en los servicios de transporte de los esclavos mas que en la agricultura y la caza de ganado.<sup>486</sup> El estado colonial también se vio envuelto en la discriminación de quien o quienes estaban permitidos de alquilar indios. Ya en septiembre de 1618, el Gobernador Hernandarias decidió que los Portugueses no debieran tener la oportunidad de alquilar indios por el daño que ello pudiera producir a los residentes y conquistadores criollos y españoles.<sup>487</sup>

A fin de mantener una cantidad razonable de trabajadores, los empresarios de Buenos Aires seguían un procedimiento contradictorio. Los empresarios de Buenos Aires tuvieron éxito en garantizar un abastecimiento estable de mano de obra compitiendo deslealmente por la misma. La existencia de una "competencia desleal" por la mano de obra significa que los más prósperos empresarios estaban capacitados para atraer trabajo indígena por medios puramente económicos, fuera del alcance de los empresarios menos florecientes. Este estudio nos permite también identificar la presencia, en manos de los indios, de una cierta "libertad" de elegir como sus patrones a aquellos empleadores susceptibles de ofrecer mejores salarios. Por ejemplo, Bartolomé, un indio de Córdoba, que fue alquilado en 1622 por Gonzalo Álvarez en \$25 anuales, un año mas tarde fue alquilado por Manuel Fredes en \$30 anuales.<sup>488</sup> De igual manera, Cristóbal, otro indio de Córdoba, que fue alquilado en 1622 por Manuel Méndez en \$26 anuales, un año mas tarde fue alquilado por Juan de la Torre en \$28 anuales.<sup>489</sup> Sebastián, un indio de San Juan que fue alquilado por Francisco Solís en 1623 en \$48 anuales, un año mas tarde fue alquilado por Bartolomé Ramírez en \$50 anuales.<sup>490</sup> Baltasar, un indio de Córdoba, que fue alquilado por Domingo de Roma, un zapatero, en 1642 en \$30 anuales, un año mas tarde fue alquilado por Luis Carvallo en \$32 anuales.<sup>491</sup> Es posible que, el caso donde el incremento salarial fue el más alto ocurrió con Bartolo, un indio de Corrientes, que fue alquilado por Ursula Barrios en 1649 en \$25 anuales, y cuatro años mas tarde fue alquilado por Pedro Isarra en \$40 anuales.<sup>492</sup> Finalmente, el caso mas transparente de abuso por parte de los empleadores fue el de Hernando, un indio de San Luis, que fue alquilado por Manuel

Méndez un año tras otro entre 1635 y 1638 en \$34, \$32 y \$33 anuales, y un año mas tarde fue alquilado por Agustín Rodríguez de la Guerra en \$36 anuales.<sup>493</sup>

Cuán libre era el sistema de trabajo asalariado en el Buenos Aires del siglo XVII es difícil de decir. Considerando que el sistema de trabajo libre ha sido tradicionalmente percibido como vinculado con las mecanismos del peonaje por deudas, este último debe ser analizado. Al instruir a sus supervisores y capataces para que abastecieran a los indígenas con provisiones a crédito y con efectivo (peonaje por deudas), los empresarios porteños se aseguraban que los indios tributarios contratados se quedaran en Buenos Aires, luego que su contrato hubiera expirado, una suerte de compulsión extralegal al trabajo.<sup>494</sup> Irónicamente, como Borah descubriera para el caso de México, el peonaje por deudas podría haber ayudado a forjar la nacionalidad argentina.<sup>495</sup>

## **G-VII El peonaje por deudas.**

El peonaje por deudas ofrecía substanciales ventajas al terrateniente. En tanto que evitaba las elevadas inversiones fijas necesarias para adquirir esclavos negros, el peonaje por deudas aseguraba el abastecimiento estable de trabajo que las encomiendas de las provincias del interior no podían proveer. Mayo demostró para el siglo XVIII de Buenos Aires, Ramírez-Horton para el siglo XVII del norte peruano y del Río (1977) para el norte novohispano, como los indígenas al consumir más de lo que podían reintegrar se convertían en perpetuos deudores de los terratenientes y de los mineros.<sup>496</sup> Esta situación particular era tanto más valedera en Buenos Aires, donde los indígenas estaban geográficamente segregados de sus pueblos, así como socialmente divorciados de sus comunidades. De este modo, a fin de balancear la falta del sostén familiar, los empleadores no encomenderos ofrecían a los indios tributarios del interior adelantos de ropa, con el acuerdo que reintegrarían su deuda deduciéndola de sus futuros salarios en las estancias de Buenos Aires. A causa de que los asalariados indígenas estaban crónicamente mal pagados, era común en los indios pedir prestado a sus caciques y usar sus futuros ingresos como garantía. Sobre 29 casos de peonaje por deuda que encontré registrados entre los conciertos notariales de indígenas para el periodo 1602-40, 18 casos, o el 62%, fueron casos en que el contratista fue un terrateniente. Este porcentaje confirma la sospecha que el peonaje por deudas urbano y rural existía ya a comienzos del siglo XVII. El porcentaje promedio de endeudamiento sobre el salario anual era del 30%.<sup>497</sup> El porcentaje mas alto de deuda sobre salario fue experimentado por Pedro Salinas, un indio de Chile, que fue alquilado en 1631 por Hernando Núñez de Guzmán, un comerciante, por un salario de \$40, habiendo el indio cobrado \$30, o el 75% de su salario, a cuenta de ropa y utensilios adelantados.<sup>498</sup>

Además del endeudamiento, el pago en especie ayudó a consolidar el sistema del peonaje por deudas. Pero, a diferencia de éste, el pago en especie ayudaba a divorciar la artesanía de la agricultura. Pagando con camisas y calzoncillos, por ejemplo, los terratenientes rurales impedían a sus trabajadores producir su propia ropa. De acuerdo con Azara, hemos corroborado que no había artesanías textiles domésticas en el campo de Buenos Aires del siglo XVIII.<sup>499</sup> Este firme divorcio entre ambas formas de trabajo podría haber sido causado entre otras razones por la extrema escasez de equilibrio demográfico entre sexos en el ambiente rural. El peonaje por deudas consistía en prestar a los indígenas tabaco, yerba mate, aguardiente y ropa, como por ejemplo tejidos quiteños, cordellate limeño, lana tucumana, etc., con el acuerdo que el préstamo representaba un adelanto salarial; y que su reintegro podía hacerse sólo con trabajo.<sup>500</sup>

Aparte del peonaje por deudas, los documentos indican que la aparcería jugó también un rol como estrategia pre-capitalista para extraer excedente esencialmente en tiempos cuando los dueños de chacras carecían de capital circulante. En 1624, Joan Bernal contrató con Amador Váez de Alpoin, un rico terrateniente Portugués, para sembrar trigo y maíz en su tierra por un periodo de dos años. Váez de Alpoin acordó en el contrato que firmó dar a Bernal la tercera parte de la cosecha.<sup>501</sup> En 1635, Manuel Gómez y un indio contrataron con Antonia de Marechaga o Mansilla, esposa de Diego Trujillo, para sembrar trigo y maíz en su chacra.<sup>502</sup> Cuatro años más tarde, en 1639, Manuel Gómez, con los ahorros ganados en este contrato compró una chacra de 400 varas, frente al río Las Conchas, en \$400.<sup>503</sup> Por cierto, los documentos no revelan que paso con el indio con quien Gómez trabajaba la chacra. Algunas veces, las relaciones salariales, el peonaje por deudas, y la aparcería aparecía combinada en el mismo contrato. En 1623, Amador Váez de Alpoin acordó pagar a Juan de la Torre \$100 pesos más la mitad de la cosecha por el servicio de administrar su estancia durante un año. Mas aun, Váez de Alpoin acordó abastecer a Torre con diez indios.<sup>504</sup>

Aparte del trabajo indígena empleado en el servicio de transporte y en la agricultura, hubo muy pocos indígenas empleados en artesanías. Pero a diferencia de las provincias del interior, en Buenos Aires la competencia se daba entre los maestros artesanos por los aprendices y el capital circulante y no entre los aprendices por los maestros. Asimismo, la necesidad de trasladarse hacia otras fuentes de ingresos y de tal modo escapar de las consecuencias de una crisis comercial, empujó a los acaudalados empresarios no encomenderos a transferir su capital comercial de la trata de esclavos a la producción doméstica. En ese esfuerzo por el dominio de la distribución de trabajo, los empresarios de Buenos Aires tuvieron indirectamente más éxito.

La comunidad artesana en el Buenos Aires del siglo XVII no estaba tan extendida como lo estaba en el Alto Perú o Chile. Sin embargo, sobre una población de 500 vecinos (residentes registrados) en 1640 solo doce eran maestros artesanos (2.5%). En forma similar, sobre una población total de 2.500 habitantes en 1640 solo 42 eran aprendices (1.7%). En forma semejante, sobre un total de 1.050 indios solo 4% eran aprendices.

Pocos indios aprendices migraban a Buenos Aires en busca de artesanos Portugueses o Españoles deseosos de enseñarles un oficio a cambio de su trabajo. Después de 1640, tres grandes maestros zapateros competían en Buenos Aires en la producción de botas y zapatos. Una actividad como la de zapatero, esto es, un oficio que comprendía una cadena de tareas simples, permitió una fuerte concentración de mano de obra. Por otro lado, ciertos servicios y productos especializados tales como aquellos provistos por barberos, sastres y carpinteros, requerían un tipo de tarea o habilidad que no podía ser fácilmente repartida en los procesos diferenciados que la producción manufacturera tal como la del zapatero demandaba. Eran precisamente estos oficios los que gozaban de la más alta frecuencia en la artesanía indígena.<sup>505</sup>

El más beneficioso oficio artesanal era la carpintería, mientras que los únicos artesanos que podían acumular una cierta cantidad de capital con el que comprar bienes raíces rurales eran los carpinteros. Este no es un hallazgo extraordinario si tomamos cuenta que como centro comercial Buenos Aires siempre mantuvo una muy alta demanda de carpinteros para calafatear los barcos arribados.

Aquellos oficios cuyos insumos implicaban la importación de materias primas, tales como sastres y herreros, detentaban el cuarto y el quinto lugar en importancia numérica.<sup>506</sup> Durante la década de 1640, sin embargo, los sastres estaban ocupados trabajando con algodón nativo. En 1644, Juan Doblado de Solís le compro a Baltasar de Figueroa y Mendoza, un residente de Santiago del Estero, 180 varas de hilo de algodón a \$2 y seis reales por hilaza.<sup>507</sup> La forma en la que Doblado distribuía este algodón no es conocida. Como no poseía esclavos, es muy probable que vendiera el algodón a comerciantes al menudeo.

Aunque el aprendiz no fuera ya un maestro aspirante a su comercio sino un permanente asalariado, en el largo plazo conchabarlo era más costoso que contratar mano de obra indígena. Sin embargo, a partir de los datos disponibles es imposible apreciar cuán significativo era el componente indígena de la fuerza de trabajo calificada urbana. De solo cinco contratos que detallaban el origen étnico de los aprendices de Buenos Aires tres fueron negros y mulatos y solo dos fueron indios.<sup>508</sup>

Sin embargo, el aprendizaje no aseguraba una mano de obra estable porque los aprendices solían fugarse más a menudo que lo que lo hacían los asalariados. El zapatero Mateo Arnal poseía 12 indios contratados y 3 aprendices; Pedro Martínez poseía 6 indios contratados y solo un aprendiz; y Manuel Coello poseía 7 aprendices y solo 5 indios contratados.<sup>509</sup> El recurrir a diferentes estrategias en el empleo de la mano de obra forzada debe haber estado condicionado por la calidad y la cantidad de la fuerza de trabajo indígena y por los salarios pagados por ella. En efecto, Manuel Coello pagaba salarios 50% mas altos que Mateo Arnal y Pedro Martínez. En este periodo 1637-39, Coello pago a sus indios un salario anual de \$60 cada uno.<sup>510</sup> Mas luego, en 1648, Coello elevo el salario un 17% a \$70 anuales.<sup>511</sup> En contraste, Mateo Arnal pago solo \$40 anuales.<sup>512</sup> Comenzando en 1643, Arnal elevo el salario un 62% a \$65 y \$70 anuales.<sup>513</sup> Mientras tanto, Pedro Martínez, en lugar de aumentar los salarios, los disminuyo. En efecto, de abonar \$40 anuales en 1643, comenzó a pagar \$30 anuales en 1648.<sup>514</sup>

Como los campesinos indios y los peones de carretas, los aprendices indios no llevaban apellidos. Estos últimos eran reemplazados con los apellidos de los encomenderos a quienes cada indio tributaba. En nuestra investigación presumimos que un aprendiz y un asalariado del mismo origen geográfico, que venían de la misma encomienda, que llevaban el mismo nombre, y que habían sido contratados en años consecutivos por el mismo artesano maestro, eran necesariamente la misma persona. Subsecuentemente, hemos sido capaces también de encontrar en los mecanismos migratorios de los indios venidos de las provincias del interior, la presencia de orígenes geográficos comunes y de relaciones de parentesco, como elementos cruciales en la selección del empleador que los habría de contratar. Los indios solían ir dondequiera podían encontrar alguien que conocieran, sea un pariente o un ex vecino, y los empresarios de Buenos Aires preferían alquilar aquellos indios que pertenecían a sus propias encomiendas, o venían de regiones con las cuales mantenían relaciones comerciales, o de lo contrario fueran parientes o amigos de sus propios trabajadores. Por ejemplo, los encomenderos de Buenos Aires, preferían alquilar aquellos indios que pertenecían a su propia encomienda. Mientras Sebastián de Orduña, alquilo ocho indios que pertenecieron a la reducción de Baradero, Manuel de Ávila y Domingo de Quintana alquilaron preferentemente aquellos indios que venían de la más próxima encomienda Bagual.<sup>515</sup> De acuerdo a la columna 5 de la Tabla 5 mencionada en la nota anterior Manuel de Ávila alquiló indios de Buenos Aires unas 19 veces más

frecuentemente que lo que habría sido si los hubiera alquilado sin distinciones geográficas.<sup>516</sup>

Finalmente, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato de trabajo firmado, el acuerdo incluía a menudo para el empresario el deber de no echar al indio sin una causal de despido, bajo pena de tener que, pagar de **vacío** (pagar todo el salario como si hubiera trabajado el término completo), y para el indio: el deber de no ausentarse ni de cometer fallas (ausencias). Pero si sucedía que escapaba, el empresario tenía el derecho de recobrar al indio con sólo mostrar el contrato. En otras palabras, el contrato jugaba desde entonces el rol de una temprana suerte de papeleta de conchavo (contrato de trabajo).

## **G-VIII La leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros.**

La clase dominante también recurría al compulsivo contrato de vagabundos, mozos mal entretenidos (jóvenes mal educados), ebrios y delincuentes, a fin de evitar la rigidez del mercado laboral. Por la leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros sentenciados, los terratenientes no se sentían obligados a pagar salarios fijos, sino sólo un jornal (un salario diario proporcional a la productividad). En suma, de acuerdo a Carl Solberg, las leyes de vagancia, algunas de las cuales no fueron revocadas hasta cerca de fines del siglo XIX, sirvieron generalmente para sentenciar a los asalariados rurales criollos a una forzada servidumbre informal, al precio que los terratenientes del Litoral tuvieran la voluntad de pagar.<sup>517</sup>

Las leyes de vagancia y conscripción, como lo aclaro Slatta, proveían los mecanismos formales para controlar al gaucho y se probó suficientemente útil para representar otros tipos de controles laborales, tales como peonaje por deudas, menos relevantes en Buenos Aires.<sup>518</sup> Muy probablemente, la depresión se incremento cuando los **mozos mal entretenidos** (o posteriormente gauchos) fugaban para evitar el reclutamiento forzado. En febrero de 1642, el cabildo abierto de Buenos Aires presento una petición sobre los vagabundos que asediaban la campaña y ordeno, debido a esta evidencia, "que cualquiera que en sus ranchos, casas, y chacras tuvieran algún personal debieran manifestarlo".<sup>519</sup> En forma similar, el Gobernador Pedro de Baygorri ordeno en mayo de 1653 "que todo residente, habitante, o pasajero, soltero y sin oficio, almacén o chacra (incluso capataces) debían enlistarse como soldados dentro de tres días o de otra manera dejar la ciudad para siempre dentro de quince días."<sup>520</sup> Impidiendo que los gauderios vendieran libremente su fuerza de trabajo en el mercado el Gobernador dejo al pobre rural a merced de la directa dominación de los terratenientes. Esta regulación impidió no solo la emergencia de una clase media de campesinos ricos que habrían arrendado las tierras de los latifundistas como farmers capitalistas pero también la emergencia de una fuerza de trabajo libre.<sup>521</sup>

Hasta este punto desarrolle extensamente las relaciones sociales de producción comprendidas en la formación de una fuerza de trabajo colonial. Ahora desearía seguir una investigación cuantitativa sobre la migración de una sobrepoblación relativa hacia Buenos Aires.

El rol articulador de Buenos Aires no ejerció una demanda exclusiva a las tres ramas migratorias antes mencionadas, porque dichas tres áreas geográficas (norte, este y oeste) también servían como bancos privados de trabajo para el Alto Perú, las Misiones Jesuíticas, San Pablo y Chile. El area norteña era el principal campo de lucha para las

demandas de trabajo de los empresarios Alto-peruanos y Bonaerenses. Cuanto mas al norte la provincia, mas pesada era la influencia de la demanda Alto-peruana y mas leve el rol de la demanda de trabajo Bonaerense.<sup>522</sup> Escudriñando siete ciudades nortenas de las cuales una alta proporción de población había sido extraída por los empresarios Bonaerenses le permite a uno probar el punto previo. Los porcentajes ponderaran la importancia relativa de la población indígena extraída por Buenos Aires en cada provincia sobre el total de la población que migro a Buenos Aires. Ellos también revelaran la importancia relativa de estas corrientes migratorias sobre el total de la población indígena de cada una de dichas provincias. Una Tabla, publicada por el autor, verifica la importancia de la demanda laboral de Buenos Aires sobre cada una de las provincias nortenas, listadas de norte a sur.<sup>523</sup> De igual manera, considerando las tasas que resultaron de contrastar la cantidad de indios extraídos sobre el total de la población indígena de cada provincia, dicha Tabla 1 nos muestra el mismo punto.<sup>524</sup>

Además de medir la migración indígena por provincia, uno puede medir la misma variable por encomienda. Esto muestra que las tasas individuales por encomienda eran mucho más altas que aquellas por provincia. A pesar del hecho que Santiago del Estero contribuyo a Buenos Aires con mas cantidad absoluta de mano de obra indígena que Córdoba, si uno considera el peso relativo que la demanda de trabajo de Buenos Aires tenia en las encomiendas de ambas provincias, uno debe concluir que Buenos Aires extraía un porcentaje mas alto de indios de las encomiendas de Córdoba que de las de Santiago del Estero, La Rioja, Esteco o Tucumán. En efecto, de acuerdo con dicha Tabla 1, las encomiendas de Esteco y Concepción del Bermejo experimentaron un drenaje laboral promedio hacia Buenos Aires de alrededor del 7%. Las encomiendas de Santiago del Estero sufrieron un drenaje promedio del 33%. Las encomiendas del Tucumán experimentaron una extracción promedio del 17%.<sup>525</sup> Finalmente, las encomiendas de Córdoba sufrieron un drenaje promedio del 26%. En Esteco y Concepción del Bermejo, solo diez encomiendas sobre un total de 66, o el 15%, intercambiaron indios con Buenos Aires. La encomienda de Quilino, manejada por Pedro Luis de Cabrera despacho tres indios de una población total de nueve indios adultos, o el 33%. La encomienda de Soto, administrada por Luis de Tejada, transporto a Buenos Aires tres indios sobre una población total de 16 indios adultos, o el 19%. La encomienda de Hernando de Texada envió cinco indios sobre un total de diez indios, o el 50%.<sup>526</sup>

La región occidental (Chile, Mendoza, San Juan y San Luis) también experimentaron una larga historia de migración económica forzada. A fines del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII, los indios Huarpes de la región de Cuyo, en el lado oriental de los Andes, experimentaron los resultados de una puja entre las demandas laborales de Chile, Tucumán y Buenos Aires.<sup>527</sup> Tal era la necesidad de mano de obra que algunos encomenderos Cuyanos lucraban alquilando sus indios a empresarios no-encomenderos tanto de Chile como de Buenos Aires. Por ejemplo, en 1603 y 1607, Álvaro de Gelves, un encomendero de Mendoza, le alquilo a un empresario chileno nueve indios.<sup>528</sup> En la década de 1620, Gelves, debido a los altos precios, prefirió alquilar sus indios en Buenos Aires.<sup>529</sup> En las décadas de 1620 y 1630, los empresarios de Buenos Aires reemplazaron a aquellos de Chile y Tucumán como los principales contratistas de mano de obra en la región Cuyana e incluso comenzaron a demandar la mano de obra Chilena misma. Las cifras de población con relación al número total de indios que migraron a Buenos Aires desde las provincias occidentales resalta este cambio. Encontramos que Chile era responsable por la emigración de 57 indios sobre un total de 104, o el 55%. Mendoza lo

era por 30 indios, o el 29%; San Juan contribuyó 9 indios, o el 9%; y San Luis proveyó 8 indios o el 8%.<sup>530</sup>

La rama litoral, incluyendo Santa Fe, Corrientes, Concepción del Bermejo, y Paraguay, también experimentaron una larga historia de despoblación forzada, o de descomposición aldeana. En 1595, el Cabildo de Santa Fe dirigió cartas a los gobernadores de Tucumán y del Río de la Plata, Pedro de Mercado y Fernando de Zarate, informándoles como los residentes de Santiago del Estero cruzaron los límites de la ciudad de Santa Fe con el objeto de sacarles indios de sus repartimientos.<sup>531</sup> En el siglo XVII, y en una manera semejante a las otras ramas estudiadas, la región Litoral fue atrapada entre las demandas de mano de obra de las Misiones Jesuíticas, San Pablo y Buenos Aires. Concepción del Bermejo en particular, fue atrapada entre las demandas de Tucumán y Santa Fe.<sup>532</sup> Cuanto mas próxima al Paraguay la región en consideración, mas relevante se volvía la importancia de las demandas Jesuíticas y Brasileñas y menor el rol de Buenos Aires. Por el contrario, cuanto mas al sur, mas relevante se volvía el rol de Buenos Aires.. Esto puede ser corroborado analizando las cifras relativas al número total de indios que migraron a Buenos Aires desde las provincias litorales. Paraguay fue responsable por la emigración de 121 indios de un total de 179 indios, o el 68%. Del resto, Santa Fe proveyó 30 indios, o el 21%; y Corrientes dio cuenta de 16 indios, o el 9%. Pero si uno analiza las cifras absolutas en relación al total de la población indígena de cada provincia, uno descubre que el Paraguay exporto 121 indios sobre un total de 3.783 indios, o el 3%; y Corrientes exporto 16 indios sobre una población total de 438 indios, o el 4%. Pero Santa Fe, la más próxima a Buenos Aires, exporto 38 indios sobre un total de 95 o el 40%.<sup>533</sup>

Las encomiendas Paraguayas fueron lentamente despobladas por culpa de los empresarios yerbateros, los misioneros Jesuitas, los barqueros dedicados al transporte ribereño del río Paraná, y los bandeirantes Paulistas, muchos de los cuales provenían de una extracción marrana o judía conversa.<sup>534</sup> Aparentemente, de acuerdo a las siguientes cifras, los últimos proveyeron la demanda más tenue.<sup>535</sup> Por ejemplo, la sola encomienda de Gabriel de Vera y Aragón con 131 indios; ocho encomiendas de Francisco Sánchez de Vera ubicadas en Yaguarón, Caazapá, y Guarambaré, compuestas de 96 indios; y la encomienda de Juan de Medina de Ocampo, localizada en Itá, compuesta de 21 indios, despacho a Buenos Aires solo dos indios cada una. De igual forma, las dos encomiendas de Domingo Berdejo de Rojas, localizadas en Tobati y Asunción, compuestas de 24 indios, la encomienda de Francisco de Espíndola, localizada en San Ignacio, compuesta de 22 indios, y las dos encomiendas de Luis de Encina, localizadas en Ipané, compuestas de 13 indios, proveyeron a Buenos Aires con solo un indio cada una.<sup>536</sup>

Sin embargo, no todos los indios en Buenos Aires venían del interior. Como fue previamente dicho, el peonaje indígena rural no se origino solo en las provincias interiores. Los indios empleados en la agricultura, las obras públicas, la construcción de iglesias y conventos, y la caza de ganado salvaje, eran principalmente originarios de zonas de refugio (reducciones indígenas) establecidas alrededor de Buenos Aires (los poblados de Baradero, Bagual y Tubichamini, de acuerdo al Censo de Góngora de 1621, que revelo 668 indios).<sup>537</sup>

De acuerdo a Murdo Mac Leod, los indios próximos a una ciudad española, un camino real, o un puerto "devenían ladinos" mas rápido que otros.<sup>538</sup> Consecuentemente, cuanto mas próximas estaban las encomiendas a los ríos Paraná y de la Plata, más grandes eran las posibilidades para un encomendero de arrendar sus indios. En cambio, cuanto más

al sur la encomienda, mas difícil era para el encomendero alquilar sus indios. Usando las cifras provistas por Ravignani y aquellas obtenidas por el que suscribe, he logrado calcular aproximadamente el peso relativo de los conciertos indígenas en aquellas encomiendas localizadas cerca de los ríos Paraná y de la Plata. Solo un pequeño porcentaje de indios locales fueron alquilados por empresarios no-encomenderos sobre una base salarial. Los registros muestran que 5 indios Chanás (reserva de Baradero) sobre un total de 40 indios (12%), 4 indios Caguané (de la reserva Bagual) sobre un total de 33 indios (12%), y 3 indios Tubichamini (reserva de Magdalena) sobre un total de 48 indios (4%) fueron alquilados por empresarios no-encomenderos.<sup>539</sup> Ninguno de los indios Serranos, Laguneros, y Vilachichis localizados mas al sur, pero también distribuidos en encomienda, aparecen en los registros notariales como asalariados contratados.

La mayoría de los contratistas de esos indios fueron mayoristas y comerciantes de las provincias interiores, seguidos en orden de importancia por los terratenientes, los dueños de carretas, los capataces de tropa, y finalmente los maestros artesanos. De un total de 393 contratistas de indios, solo 104 contratistas, o aproximadamente un cuarto de ellos, invirtieron en tierra urbana o rural en Buenos Aires. Los tres cuartos restantes, eran comerciantes de las provincias interiores que alquilaban sus casas mientras hacían negocios en Buenos Aires. De aquí que, encontramos finalmente que la demanda de mano de obra de Buenos Aires era principalmente impulsada por comerciantes del interior que traficaban en Buenos Aires. Al dar prioridad a los servicios de transporte y almacenamiento, los contratistas de indios estimulaban la artesanía urbana local, a través de contratos de aprendizaje. Debido a la escasez de artesanos Europeos, 102 contratos con indios artesanos, y 22 contratos de aprendizaje fueron negociados en Buenos Aires en el periodo 1614-48.<sup>540</sup>

El problema de la migración indígena de las provincias o de las aldeas correspondientes a los límites provinciales del Paraguay comenzaron en la década de 1590, con los primeros establecimientos en la frontera. Las Ordenanzas de Juan Ramírez de Velasco (1597) ordenaban que los Presidentes, soldados y comerciantes comprometidos con la migración forzada de indios a otros lugares debían ser obligados a guardar registro así como fianza para su restitución.<sup>541</sup> Pero mediante la declaración de pobreza de la una aldea, lograba evadir el pago de la caución legal para el retorno de los indios reclutados para la cosecha de la yerba. Los gobernadores Paraguayos tomaron contra-medidas para compensar el éxodo indígena que resultaba del comercio de la yerba. Las flotas de carretas por ejemplo, estaban obligadas a registrar los jornaleros y depositar la garantía para el retorno de esos trabajadores. Esta última estipulación se conformaba con el hecho de que un gran número de indios en las provincias del Tucumán y Paraguay se fugaban, dejando sus esposas y familia y socabando así la estructura social que la Iglesia estaba tratando de preservar.<sup>542</sup>

## **G-IX La fuga de las encomiendas.**

La razón de fugarse de las encomiendas obedecía esencialmente a la lastimosa naturaleza del trabajo y la baja paga que los indios recibían. El trabajo era peor en las encomiendas del interior que en Buenos Aires porque el trabajo en los yerbales paraguayos o en los obrajes de paño tucumanos eran extremadamente arduos y exigentes. Enviar a los indios a trabajar en los yerbales era casi como propinarles una sentencia de muerte. En cambio, la agricultura del trigo en Buenos Aires era mucho menos intensiva en trabajo que la yerba en Paraguay o el paño en Tucumán. En otras palabras, el trabajo de preparar la

tierra, sembrar, cosechar y procesar el cultivo era distribuido en forma mucho más pareja durante el año, que producir yerba o paño. Comparado con el trabajo en el negocio de transporte (carretas tiradas por bueyes) o en las chacras de Buenos Aires, los trabajadores de las encomiendas del interior estaban en una situación mucho peor.

¿Dónde iban finalmente los indios? ¿Morían simplemente como resultado de las varias epidemias que asolaron a Buenos Aires, o regresaban a sus hogares en las provincias del interior? A pesar de que existen muchos elementos como para sugerir que ambas posibilidades se dieran, he sido incapaz de descubrir la exacta razón por la cual, a mediados del siglo XVII, los contratos notariales entre los empresarios no encomenderos de Buenos Aires y los indios de las provincias norteñas, llegaron repentinamente a su fin. Assadourian me confió en una conversación privada, que sería muy posible que la migración indígena proveniente de las provincias norteñas continuara afluyendo pero el requisito legal de que cada indio contratado fuera registrado ante el notario, tal como lo imponían las Ordenanzas de Alfaro, haya sido simplemente removido. Esta última interpretación podía muy bien ser verdad considerando que Felipe IV, debido a las profundas necesidades de tesoro causadas por la contienda internacional del período, publicó en 1640 una pragmática real que impuso sobre cada contrato la obligación de utilizar papel sellado.<sup>543</sup> Personalmente, sin embargo, creo que la principal razón porque el registro de estas contrataciones notariales vinieron a término fue debido al hecho de que estos indios o sus empleadores no-encomenderos simplemente dejaron de pagar tributo a sus encomenderos originales, cambiando así su status de mitayos a yanaconas, o simplemente retornando a su aldea o encomienda original.

Los indios de las provincias interiores usualmente venían a Buenos Aires dejando a sus mujeres e hijos en sus encomiendas de origen. Tal fue la cantidad de indios solteros inmigrados en 1610 que el Cabildo de Buenos Aires temía con fundamento que aquellos indios cometieran bigamia con las indias locales.<sup>544</sup> El contratista de Buenos Aires que se beneficiaba de ellos imponía los costos de mantenimiento y reproducción a las comunidades indígenas, cubriendo con los salarios pagados al trabajador solo la reconstitución de la inmediata capacidad de trabajo.<sup>545</sup> Por lo tanto, de acuerdo con la expresión de Tandeter "...la mano de obra indígena era un medio mediante el cual las comunidades indígenas transferían valor a la esfera de la producción donde el trabajo compulsivo era aplicado".<sup>546</sup> Concordantemente, como sabemos por Alejandro Portes, el bajo costo del trabajo en las economías que mantenían un sector tradicional de subsistencia venía no solo de la explotación del trabajo del asalariado sino también del trabajo de su grupo étnico, que a su turno preservaba la viabilidad de la economía de subsistencia.<sup>547</sup>

Considerando que la mayoría de aquellos indios que vinieron a Buenos Aires a trabajar por un salario dejaron a sus mujeres y niños en sus encomiendas de origen y que muchos de ellos podrían haber incurrido en bigamias, uno se pregunta que les podría haber sucedido una vez que regresaban a sus tierras de origen. Mi conjetura personal es que aquellos indios perdieron su condición de originarios y se convirtieron en una suerte de indios forasteros. Aquellos indios que se convirtieron en forasteros fueron forzados a registrarse de manera tal que pudieran proveer trabajo de mita y pagar tributo.<sup>548</sup> Al ser forzados a registrarse, estos indios migrantes se volvieron extremadamente susceptibles a la insurrección. De este modo, es presumible que las extendidas rebeliones que estallaron en la década de 1630 y 1640 en la provincia de Tucumán hayan sido lideradas por aquellos indios forasteros que aprendieron, mientras trabajaban en Buenos Aires, otros dialectos indígenas, y que experimentaron en sus vidas económicas agudos contrastes, como el

haber sido incluidos en la aparcería y el trabajo asalariado.<sup>549</sup> Al haber experimentado un prolongado período de crecientes expectativas y crecientes gratificaciones en el área de Buenos Aires, seguido por un agudo trastorno en su tierra de origen, los indios forasteros se sintieron inclinados a rebelarse tan pronto como se percataron del ensanchamiento de la brecha entre las expectativas y las gratificaciones.<sup>550</sup>

Sin embargo, este no era el caso de aquellos indios nacidos en la región de Buenos Aires que pertenecían a las pocas reducciones establecidas en sus alrededores. Cuanto más cerca estaba la reducción de una ciudad española, un camino real o un puerto, tanto más fácil se volvía su proceso de aculturación.<sup>551</sup> De ahí que, porque los indios de la reducción de Baradero no se fugaron tan a menudo como aquellos indios de las reducciones de Bagual y Tubichaminí. Ninguno de estos últimos, a pesar de su segregación residencial, tenía una historia demográfica estable, por cuanto la mayoría de sus indios se fugaron tan pronto como los tributos o las enfermedades amenazaban su vida comunitaria. Por ejemplo, en el caso de la reducción Bagual sus indios se escaparon dos veces en casi una década. Primero en 1609. En la segunda oportunidad, ocurrida en 1620, los indios Baguales fueron recobrados por medio de estrategias militares y religiosas.<sup>552</sup> Y considerando que los caciques de ambas encomiendas Bagual y Tubichamini estaban relacionados entre si uno puede muy bien pensar que cada vez que los indios Baguales se escapaban los Tubichaminí seguían su ejemplo.<sup>553</sup>

En suma, he mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al mundo comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los mercaderes de Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de formación de una fuerza de trabajo colonial, así como la articulación de Buenos Aires con su propio hinterland. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los encomenderos del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el trabajo indígena de las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos en su nuevo establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían acostumbrado a cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo donde migrar.

## NOTAS

### Epílogo Sección I-B

Para resumir, concluyo a partir de la evidencia incorporada en esta sección que, a diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de Buenos Aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de tierras, se casaron con mujeres criollas locales y se involucraron en la política local. Además, a diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes portugueses en Buenos Aires no experimentaron ningún tipo ostensible de persecución religiosa, aunque la amenaza potencial nunca dejó de existir. Dada esta movilidad económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa en Buenos Aires en el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una posición intermediaria a

una dominante, así como por qué evitaron siempre una estrategia de diferenciación nacional.

En suma, hemos verificado como la penetración colonial en la campaña de Buenos Aires bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambio los patrones culturales, de una estrategia de producción de pequeña mercancía, administrada por la facción Benemérita, hacia una estrategia de producción agraria en gran escala, orientada al mercado, administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, en esta sección se ha demostrado que para estimular una estrategia de desarrollo rural en gran escala una clase de empresarios no-encomenderos debió recurrir a la adquisición de tierra pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda brasilera de vituallas.

Y a fines del siglo XVIII la fragmentación social subsistente entre los mercaderes asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios la mayor parte de la población mercantil activa estaba discriminada de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado y en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

En cuanto a la esclavitud, ésta actuaba como una de las condiciones restrictivas que impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.<sup>554</sup> Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.<sup>555</sup> Pero esto no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud estipendiaria.

En suma, hemos mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al mundo comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los mercaderes de Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de formación de

una fuerza de trabajo colonial, así como la articulación de Buenos Aires con su propio hinterland. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los encomenderos del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el trabajo indígena de las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos en su nuevo establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían acostumbrado a cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo donde migrar.

### **Sección I-C    Articulación de un *entrepôt* mercantilista con un *hinterland* minero-rural**

Así como hemos estudiado en las secciones anteriores la naturaleza de la crisis colonial y la índole de la sociedad albergada en su seno, en esta tercera sección habremos de investigar las articulaciones o relaciones etnológicas de naturaleza económica. En efecto, en esta sección, dedicada a investigar un *hinterland* colonial-mercantilista, trato en cinco (5) capítulos consecutivos los circuitos mercantiles de un *entrepôt* colonial (punto de intermediación), la guerra y la paz y las fases del comercio, el reparto forzoso de mercancías y las presiones mercantiles, las fluctuaciones cíclicas del comercio y el rol del crédito mercantil, y la comercialización del cuero y las vaquerías de la Banda Oriental.

En efecto, en esta sección nos dedicamos a analizar la estabilidad del estado colonial y el rol que en ella jugaron los mercados. Asimismo, nos preguntamos si la intensidad de los mercados laborales e inmobiliarios afectó la estabilidad de la estructura social colonial. Para analizar los mercados de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales investigaremos el monto y la intensidad de las operaciones transcurridas en dichos mercados. Para investigar su comportamiento estudiamos también los casos en que se manifestaron procesos de movilidad interna.

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña. Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.<sup>556</sup> La escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre, presidió asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba.<sup>557</sup> La escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.<sup>558</sup> La extrema fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.<sup>559</sup> La centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas

provincias alentó el desarrollo de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones como los derechos de abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y censos en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

## **Capítulo I-C-8      Circuitos mercantiles de un *entrepôt* colonial**

### **Índice**

- H-I      Tradición historiográfica en materia de balanza comercial
- H-II     El comportamiento de los mercados

### **H-I      Tradición historiográfica en materia de balanza comercial**

En cuanto a la articulación económica con el hinterland rioplatense por parte del *entrepôt* porteño, este se veía afectado por el rol de los ciclos comerciales.<sup>560</sup> Estos últimos eran provocados --a juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986)-- tanto por las guerras Europeas que generaban desequilibrios positivos en la balanza comercial como por los momentos de paz que causaban desequilibrios negativos.<sup>561</sup> Con respecto a la llamada crisis del siglo XVII, Bakewell (1976) se preguntaba para el caso de la Nueva España y la guerra que llevaban los piratas holandeses contra los bajeles de plata españoles enmarcada en la denominada Guerra de los Treinta Años (1618-48) "...¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?".<sup>562</sup> Y en el período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981,1985), y Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al periodo inmediatamente precedente.<sup>563</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), y que se prolongó hasta fines de la llamada guerra de los Siete Años (1761-63), fue el más significativo de todos, como lo verifiqué recientemente en un artículo de mi autoría.<sup>564</sup>

### **H-II     El comportamiento de los mercados**

Con respecto al comportamiento de los mercados de productos, factores y servicios, estos se diferenciaban según la composición orgánica de capital vigente en cada economía y según el tipo de producto de que se tratase. En economías donde la composición orgánica del capital es intensiva en el factor tierra, es decir donde la tierra es abundante y la mano de obra escasa, la modernización económica tardía, a juicio de Rogowski (1987), radicaliza a los propietarios del factor tierra en favor del librecambio más bien que a los del factor mano de obra.<sup>565</sup> En tales economías de frontera, el capital mercantil y el trabajo artesanal se hallan en el mismo bando político, pero en esta oportunidad en apoyo del proteccionismo. En sociedades con ausencia de conflictos sociales, no se requiere de un estado poderoso.<sup>566</sup>

Pero en aquellas economías donde la diversa composición orgánica perjudicaba al capital, es decir donde abundaban los factores mineros (tierra) y demográficos (mano de obra) y donde escaseaba el crédito (México, América Central y el macizo Andino), mientras ciertos autores,<sup>567</sup> han sostenido que los ingresos de todo tipo de capellanías y obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;<sup>568</sup> otros autores,<sup>569</sup> han

argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fue no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.<sup>570</sup> En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a la institución eclesiástica (Iglesia) más como un consumidor de la riqueza colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,<sup>571</sup> y Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como rentistas señoriales.<sup>572</sup>

Por ejemplo, mientras que en las economías del macizo andino, Assadourian (1980) despertó la tensión al advertir que la crisis semi-secular de la minería andina colonial habría sido precipitada por la quiebra de los insumos más críticos (el azogue y la mano de obra), los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus venas producía; Tandeter (1980), atribuía la vulnerabilidad de la minería andina, y por consiguiente la crisis social pre-moderna, a la delicada ecuación que la mano de obra (demografía mitaya) mantenía con el factor tierra (la geología del cerro de Potosí). Y en las economías de abundante tierra libre como el Río de la Plata (Banda Oriental durante el siglo XVIII), mientras Azcuy Ameghino (1988) insistía en los indudables mecanismos extra-económicos pre-modernos que existieron para retener y disciplinar la mano de obra rural, Amaral (1987, 1989), Garavaglia (1987) y Gelman (1989), persisten en atribuir la crisis social pre-moderna a la estacionalidad de la fuerza de trabajo rural, marcada por el ciclo agrícola.

Por el contrario, en aquellas economías donde la composición orgánica del capital ponía hincapié en el rol desempeñado por el capital comercial, hubo quienes negaban la relevancia del crédito mercantil en el período colonial americano,<sup>573</sup> y quienes por el contrario sostuvieron que en el pasado rigió una intensa reciprocidad crediticia que aceleraba la rotación del circulante,<sup>574</sup> reflejada en las cartas de poder en causa propia, el fiado, los vales, las libranzas y las cesiones de crédito.<sup>575</sup> Para estos autores, la inflación o alza de los precios y la correlativa devaluación del dinero metálico significó una profunda erosión de la base material de las elites encomendiles, las cuales recibían de sus encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas, todo lo cual las inhabilitaba para participar de la venalidad, o como lo denomina Salzmann (1993), la privatización de los oficios públicos.<sup>576</sup> Al continuar las inyecciones de medios de pago metálico y crediticio --notariales y extra-notariales-- los comerciantes comenzaron a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de rotación del circulante.<sup>577</sup> Para una lectura demografista (transaccionista) y velocista de la Teoría Cuantitativa del Dinero --diseñada por Goldstone (1984, 1991)-- las contradicciones, fracturas y conflictos económicos y sociales de la modernidad absolutista temprana aparecerían debido a una cada vez más compleja red de intercambios mercantiles.<sup>578</sup>

El comportamiento de los mercados variaba también según el tipo de producto comercializado. Podía ser que se trataran de productos importados, de frutos americanos exportables (cueros), de productos americanos no exportables (como la yerba mate o el ganado en pie en el Cono Sur), o de los salarios y los alquileres. Respecto de los productos importados, y de frutos americanos exportables (cueros), L. Johnson (1990, 1992) y Saguier (1991b), en contraste también con Romano (1963), sostuvieron para la región del Río de la Plata, que en la segunda mitad del siglo XVIII se experimentó en sus precios una

tendencia ascendente en el largo plazo; y para Chile, De Ramón y Larraín (1982), encontraron una tendencia ascendente sólo a partir de 1799. En cuanto a los mercados de los productos americanos no exportables (como el ganado en pie y la yerba mate en el Cono Sur), Moutoukias (1988) fundado en un manuscrito inédito de mi autoría y mucho antes Garavaglia (1976) habían observado que --a diferencia de los mercados de productos Europeos-- sus precios no permanecieron estancados ni sus mercados eran meramente compulsivos, pues "los precios sufrían graves alteraciones en el corto plazo".<sup>579</sup> Garavaglia (1983), contrastando sus datos con los de Wachtel y Tandeter (1983), nos advierte además que cuando los paraguayos detienen el comercio de la yerba mate, los precios de la yerba en Potosí tienden a subir. Estas fluctuaciones de precios en el interior de mercados como el de Buenos Aires, solo obedecería para Carmagnani (1975) a la existencia de una demanda interna o local capaz de desequilibrar episódicamente la oferta y la demanda globales. En cambio, las fluctuaciones de precios de mercancías europeas, dentro de mercados como el potosino, confirmarían según Wachtel y Tandeter (1983), la tesis de Romano (1963) acerca de la originalidad de la coyuntura sudamericana respecto de la europea.

Pero la vigencia generalizada de relaciones de reciprocidad o no mercantiles, la escasa productividad, el consiguiente bajo desarrollo de la economía de mercado, las múltiples presiones mercantilizadoras o privatizadoras, y las nuevas fracturas impuestas por la competencia naciente que trajo el llamado Libre Comercio, impusieron en el mundo colonial la necesidad de maximizar la renta y disminuir los costos de transacción. Para cumplir esta imposición se necesitaron --como afirma Pastore (1991), fundado en las teorías de Baysinger (1981)-- mecanismos coactivos de circulación de mercancías y mano de obra.<sup>580</sup>

## Capítulo I-C-9

### **Guerra y paz y fases del contrabando (siglos XVII y XVIII)**

#### Índice

- I-I Ciclos comerciales porteños.
- I-II Interrupciones del comercio exterior.
- I-III Períodos de guerra y paz en el tráfico mercantil (siglo XVII).
- I-IV Períodos de guerra y paz en el comercio (siglo XVIII).

#### **I-I Los ciclos comerciales porteños.**

Los ciclos comerciales de Buenos Aires fueron influenciados por factores externos e internos. Entre los primeros, estaba la demanda europea de plata libre de impuestos y la demanda brasilera de harina. Entre los últimos, las diferentes intensidades de producción de plata y provisiones, el grado en que los constreñimientos indirectos externos (las actividades de contrabando) eran enfrentados por el estado colonial, y la cantidad de mano de obra disponible para el transporte de bienes. Estos factores económicos y políticos eran ocasionalmente fortalecidos por interrupciones, tales como desacuerdos entre los mercaderes de Lisboa y Sevilla, crisis económicas mundiales, políticas aduaneras, epidemias, violencia política, y rebeliones indígenas.

La paradoja de la América Latina colonial era que en los puertos de salida, tal como Buenos Aires, que drenaba más plata ilegal que cualquier otro, cada vez que había paz y el comercio ultramarino fluía tranquilamente, había escasez de metálico. Aún cuando había una interrupción del comercio exterior, la ciudad portuaria era plenamente abastecida con plata. De acuerdo al pensamiento mercantilista, una efusión de plata es comparable a una caída en un factor de producción y, vía incremento de la tasa de interés, tiene un gran impacto depresivo en la economía del país abastecedor. El efecto opuesto ocurre en el país que experimenta una afluencia de plata. Pero Buenos Aires, como la totalidad de Hispanoamérica, no sufrió un incremento en la cantidad absoluta de plata en circulación durante el siglo diecisiete, a causa de la permanente efusión de la misma hacia otros países metropolitanos.<sup>581</sup>

## **I-II Interrupciones del comercio exterior.**

Las interrupciones del comercio exterior fueron siempre resultado de la competencia metropolitana. Durante el período en que prevaleció la unión dinástica entre Portugal y España (1580-1640), las burguesías sevillana y lisboeta, comercialmente dependientes de Francia, Inglaterra, y los Países Bajos, lucharon competitivamente por la hegemonía del comercio colonial. Las ciudades de Cartagena y Buenos Aires, alternativamente, se convirtieron en los campos de batalla donde esta hegemonía era disputada. Cada vez que la trata de esclavos era conducida legalmente a través de Cartagena, una depresión comercial era sentida en Buenos Aires. Cuando esto sucedía, aquellos sectores económicos de Buenos Aires no vinculados a la trata intentaban incrementar su poder así como fomentar actividades económicas (proteccionismo y monopolio). A la inversa, cada vez que se suscitaban desacuerdos entre mercaderes sevillanos y lisboetas, Buenos Aires era elegida, ilegalmente, como el principal centro comercial, la interrupción del comercio exterior concluía, la tasa de interés y el costo de vida crecían casi espontáneamente, el desempleo disminuía, y aquellos sectores vinculados a actividades del mercado interno perdían poder frente a los intereses anti-monopolísticos del "libre comercio".

## **I-III Los períodos de guerra y paz en el tráfico mercantil (siglo XVII).**

Los períodos de guerra y paz determinaban en gran parte el patrón de desarrollo mercantil. Cada vez que estallaba la guerra en el mar entre España y Portugal o entre Francia e Inglaterra, la compra a crédito disminuía, se disponían situados (subsidios) para propósitos militares, Buenos Aires perdía su rol como centro comercial, y el bloque en el poder (la alianza intra-colonial) se desgastaba. Cuando había amenazas directas externas de invasiones militares sobre Buenos Aires, los socorros (tropas) eran enviados al puerto desde las norteamericanas provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán y Paraguay.<sup>582</sup> Los mercaderes coloniales, como resultado de las grandes caídas en las tasas de interés a causa de los constreñimientos directos externos (el peligro de invasiones extranjeras), estimulaban el crédito hipotecario. Cuando se alcanzaba la paz entre ambas potencias metropolitanas, los constreñimientos indirectos externos (las actividades de contrabando) eran reactivados, se reanudaba la venta a crédito, el crédito hipotecario disminuía, y el porcentaje de prestatarios sobre prestamistas se aceleraba. Buenos Aires se convertía nuevamente en un centro comercial y la alianza de clases mercantil se reconstituía. Asimismo, los constreñimientos internos (las guerras indígenas y las rebeliones) no eran ajenos a la existencia de los pobladores de Buenos Aires. Mientras las guerras araucanas

en Chile y el peligro de invasiones exteriores tuvieron un impacto positivo sobre la economía agraria de Buenos Aires, las rebeliones de los indios calchaquies y de los pampas causaron, respectivamente, una caída de los envíos de ganado al Alto Perú y de las vaquerías en la pampa.

Sin embargo, las principales interrupciones eran causadas por constreñimientos directos externos (las guerras por mar y el peligro de invasiones externas) y por políticas aduaneras fuertemente represivas. Una vez que se declaraban las guerras, la cotización mundial del riesgo del mar se duplicaba casi inmediatamente. No valía la pena enviar a las colonias un barco a tal precio. Más y más mercaderes eran obligados a asegurar sus barcos sólo parcialmente, o sólo el barco y no la carga, o aún a renunciar al seguro por completo y depender de la velocidad y de la fortuna para proteger su inversión. Los precios de las mercancías reflejaban rápidamente este hecho. Tan pronto como las noticias sobre declaración de guerra de España llegaban a Buenos Aires, o a algún otro puerto hispanoamericano, los mercaderes procedían a acaparar todos los productos españoles metropolitanos que permanecían en el puerto como un negocio especulativo que avizoraba una gran demanda y exorbitantes precios.<sup>583</sup> La mercadería europea se convertía en extremadamente escasa y la plata era acumulada en enormes sumas líquidas. Los especuladores en España y los mercaderes extranjeros en Buenos Aires trataban de mantener y, si era posible, incrementar el alza de precios en el mercado de bienes o, en otras palabras, sobrevaluaban las importaciones y subvaluaban las exportaciones. La mercadería era mantenida fuera del mercado durante el mayor tiempo posible con el fin de incrementar su precio. Pero para poder retener la mercadería, era necesario el uso del crédito, que resultaba a su vez en un incremento de la tasa de interés.<sup>584</sup>

Desde 1593 a 1640, la expansión de la venta a crédito fue principalmente determinada por la naturaleza de la trata de esclavos, tanto en Angola como en la travesía por mar, y por el grado de los constreñimientos externos e internos (las invasiones extranjeras y las políticas proteccionistas). Por un lado, cada vez que el abastecimiento de mano de obra esclava en las ferias de esclavos africanas disminuía, la trata de esclavos atlántica decrecía. Asimismo, cada vez que ocurría un desacuerdo entre los mercaderes sevillanos y los lisboetas, concluyo que Buenos Aires debe haber sido elegida como el destino del contrabando de esclavos y, consecuentemente, tanto las transacciones en efectivo como las crediticias se expandían.<sup>585</sup> Cuando se alcanzaba un acuerdo en el centro metropolitano, la trata legal penetraba en Cartagena y de este modo, socavaba la venta a crédito en Buenos Aires. Por otra parte, cada vez que las políticas proteccionistas eran vulneradas por medidas de "libre comercio", las actividades comerciales se expandían. Contrariamente, cada vez que las políticas proteccionistas se fortalecían con medidas represivas, la trata de esclavos se contraía.

El crédito puede haberse expandido en el primer ciclo de este periodo desde 1593 a 1598. Aunque carecemos de evidencia notarial para este periodo, la correspondencia comercial entre dos comerciantes en la década de 1590 nos revela que la presencia de comerciantes Portugueses procedentes de Brasil a través de Buenos Aires socavaba el rol de Santiago de Chile como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucumán.<sup>586</sup> Corroborando este periodo, los registros de la Casa de Contratación en Sevilla declaraban que un total de 1.020 esclavos del asiento de Pedro Gómez Reinel, un comerciante monopolista Portugués, fue específicamente registrado para Buenos Aires. El comerciante Manuel Machado actuó como un agente comercial o consignatario de este Asentista en

Buenos Aires.<sup>587</sup> En 1599, Gómez Reinel fue procesado por fraude y renunció el asiento a favor de la corona, causando un profundo colapso en las transacciones crediticias.<sup>588</sup>

Cuando Hernandarias asumió la gobernación de Buenos Aires en 1603, comenzó a perseguir el comercio ilegal. Mientras que en 1592, 22 navíos arribaban a Buenos Aires, en 1603, Hernandarias le escribió al Rey en un estilo jactancioso que solo una docena de navíos habían arribado.<sup>589</sup> El resultado lógico debió haber sido un profundo debilitamiento del sistema crediticio. Dos años más tarde, en 1605, debido al tratado de asiento firmado por la corona con el asentista Gonzalo Vaez Coutinho, las transacciones crediticias se expandieron. El crédito total saltó de \$6.565 en 1603, a \$43.693 en 1605, y \$43.480 en 1606, totalizando \$91.000 ().<sup>590</sup> Las importaciones de mercaderías crecieron de \$9.398 en 1603, a \$34.812 en 1604, y \$51.695 en 1605, totalizando \$96.000 por el período de tres años.<sup>591</sup> Entre 1603 y 1605, alrededor de 2.600 esclavos valuados en \$182.000 fueron importados.<sup>592</sup> Contrastando las cifras crediticias totales con el monto de las importaciones totales revela que el 27% de todas las importaciones fueron adelantadas a crédito mientras que el 73% deben haber sido necesariamente operadas en efectivo, y presuntamente con plata sin sellar o ilegal.

De resultados de esta expansión de las operaciones crediticias, otras actividades económicas fueron afectadas. En otra Tabla publicada en el artículo citado sugiere una correlación directa entre el incremento de barcos arribados, barcos que fueron vendidos, importaciones de esclavos, y embarques de carretas para los años 1604-1607.<sup>593</sup> De los 34 barcos que entraron a Buenos Aires en dicho período, ocho barcos por valor de \$6.500 fueron vendidos en el mercado de navíos. Dichos barcos descargaron 2.993 esclavos valuados en \$200.000. La mayoría de los esclavos fueron reembarcados en carretas directamente al Alto Perú y a Chile. Aunque 375 esclavos cambiaron de amo en Buenos Aires, fueron adquiridos también con el propósito de introducirlos al Alto Perú y a Chile. Algunos de los esclavos que fueron adquiridos en Buenos Aires fueron embarcados al Alto Perú en 90 carretas por Antonio de Ávila, Gerónimo Luis de Cabrera, y Alonso Díaz Caballero, todos residentes en la ciudad de Córdoba.<sup>594</sup> El ciclo expansivo en transacciones crediticias alcanzó su crisis en 1607 cuando la Junta de Negros en Sevilla decidió cancelar el asiento de Gonzalo Vaez por no haber abonado las fianzas que había prometido.<sup>595</sup> El comercio con provincias interiores fue también afectado por la Real Cédula de Ampudia emitida por el Rey en 1606 prohibiendo la exportación de trigo y harina de la provincia de Tucumán a Buenos Aires.<sup>596</sup> De resultados de esta prohibición, Buenos Aires reemplazó a Córdoba como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucumán. Finalmente, el comercio fue severamente dañado por las rebeliones indígenas. En 1607, una flota de navíos viajando al Paraguay fue atacada por indios Charrúas.<sup>597</sup>

Por un lado, de resultados de la negativa de la corona española en 1611 a renovar el asiento con el asentista Portugués Gonzalo Vaez Coutinho, concluimos que una gran porción del comercio esclavo que previamente circulaba legalmente a través de Cartagena comenzó a ser canalizado ilegalmente a través de Buenos Aires. Por otro lado, las ferias esclavas en Angola en 1614, de acuerdo con el Gobernador de Angola Bento Banha Cardoso, estaban floreciendo.<sup>598</sup> Como ilustra una Tabla publicada en el artículo citado, el crédito de venta en Buenos Aires se elevó de \$5.762 en 1610, a \$36.836 en 1613, totalizando \$137.000 en los años 1610-1613.<sup>599</sup> Consecuentemente, el crédito de compra para adquirir esclavos en África se incrementó nuevamente en 1613-15.<sup>600</sup> La mayor parte del crédito adelantado era para la venta de esclavos: \$27.604, o el 76% del crédito de venta, transferido en 1613, y \$47.259, o el 80% del crédito de venta, transferido en 1614,

era para operaciones con esclavos. Las cifras precedentes sugieren que el crédito de venta decreció con respecto al período 1603-06, disminuyendo 8 puntos de porcentaje, de 27% en el período 1603-06 a 19% en 1610-15. Doce barcos sobre 68 navíos arribados a Buenos Aires desde 1610 hasta 1615 fueron revendidos. Los propietarios de esclavos pagaron fianzas por 2.782 esclavos, 67 carretas fueron fletadas, y 80 indios fueron alquilados.<sup>601</sup> Estas cifras corroboran la correlación directa entre el incremento de barcos arribados, la venta de barcos, los esclavos importados, las carretas fletadas, y los indios contratados.

Los comerciantes que llevaban esclavos al Alto Perú se endeudaron para pagar peajes fiscales por 2.782 esclavos. De resultas de sus ventas, los comerciantes de esclavos ganaron, durante este período, alrededor de \$1.700.000. Sus enormes ganancias terminaron abruptamente, sin embargo, en 1615 cuando se firmó un nuevo asiento con el Portugués Fernández d'Elbas.<sup>602</sup> El comercio esclavo legal paso de nuevo a través de Cartagena, mientras en Buenos Aires el Gobernador Hernandarias ocupó el poder por tercera vez y comenzó a procesar a los contrabandistas Portugueses. El número de barcos arribados disminuyó de doce en 1615 a tres en 1616. Las importaciones cayeron dramáticamente, disminuyendo de \$134.392 en 1615 a \$42.067 en 1616.<sup>603</sup> El crédito de venta declinó aun mas, cayendo de \$41.484 en 1615 a \$2.875 en 1616.<sup>604</sup> Pero aun si un acuerdo entre ambas Lisboa y Sevilla no había concluido o Hernandarias no hubiera asumido el poder, las importaciones de esclavos en Buenos Aires deben haber caído abruptamente, por cuanto en 1616 las tasas de riesgo de mar se catapultaron a raíz de la captura de 16 navíos portugueses por los Holandeses en alta mar.<sup>605</sup> Además, aún cuando las tasas de riesgo de mar no se hubieren incrementado tan drásticamente, las importaciones de esclavos en Buenos Aires debían haber disminuido drásticamente por cuanto en 1617, de acuerdo con el nuevo Gobernador de Angola Luis Mendes de Vaconcelos, las ferias de esclavos en Angola "...casi cesaron de funcionar por falta de esclavos",<sup>606</sup> presumiblemente debido a la fructífera competencia que los Holandeses fueron capaces de desarrollar mediante recursos militares.

Por segunda vez, comenzando en 1618, a Buenos Aires le fue permitido comprometerse en su propia clase de comercio limitado. Debido a la enorme presión ejercida sobre la corona por los intereses del comercio esclavo, en 1618, Felipe III le dio a Buenos Aires una gobernación autónoma del Paraguay, permitió al asentista Portugués Fernández d'Elbas embarcar a Buenos Aires 450 esclavos en un trienio, y autorizó un permiso especial mediante el cual en un período de tres años dos barcos zarparían anualmente de Sevilla a Buenos Aires, cargados con mercadería Europea que no excediera de dos toneladas cada uno.<sup>607</sup> Simultáneamente, Hernandarias tuvo que retirarse de la gobernación sucediéndolo Diego de Góngora. Con el advenimiento de Góngora como gobernador en 1618, el contrabando resucitó. El número de navíos arribados a Buenos Aires creció de uno en 1618 a diez en 1619. Las importaciones y el crédito crecieron. De acuerdo con la Tabla 1 del artículo citado, el crédito de compra y de venta se expandió de \$4.010 en 1617 a \$26.546 en 1619 y totalizó \$181.000 para los años 1617-19.<sup>608</sup> Estas cifras indican que el 80% de las importaciones fueron obtenidas mediante efectivo y solo el 20% mediante el crédito.

Tan pronto como los Españoles descubrieron que la Tregua de los Doce Años (1609-1621) fracasó en detener el contrabando Holandés con sus colonias americanas, el conflicto comercial con Holanda dio lugar al estallido de la Guerra de los Treinta Años (1618-48) entre España y los Países Bajos.<sup>609</sup> Con el estallido de la Guerra en la década de 1620, el comercio esclavo del Atlántico recayó en el caos. Es muy difícil de seguir los

movimientos clandestinos entre el gobernador, el cabildo y los comerciantes nativos y extranjeros en esos años. Cada uno de los mismos llevaba un interés propio. Aunque la producción de plata en el Alto Perú en 1620-21 no se incrementó, las remisiones oficiales de plata desde Lima a España se redujeron abruptamente (alrededor del 50%).<sup>610</sup> Por supuesto, toda la culpa recayó en la conducta de Buenos Aires.<sup>611</sup> Desde 1621 hasta que Lima decidió --de resultas del creciente contrabando holandés-- intervenir en la gobernación de Buenos Aires en 1624, la actividad comercial legal e ilegal en Buenos Aires alcanzó el punto más alto del siglo. El monto de las importaciones legales en Buenos Aires era aproximadamente el 3.4 % de la producción anual de plata registrada en Potosí (la mitad del monto de remesas Reales de plata que Perú envió directamente a España a través de la flota de Portobelo).<sup>612</sup> Pero el monto total de las importaciones (incluyendo las importaciones ilegales) pueden haber alcanzado, en su punto más alto (1600-25), como máximo el 25% y como mínimo el 15% de la producción total de plata del Potosí.<sup>613</sup> Esta es la razón por la que el mercado minero Altoperuano mantuvo una influencia directa aún en el monto y la naturaleza de la mercancía importada a través de puertos como Buenos Aires, localizados a distancia tan lejana de los yacimientos de plata.

Durante los años 1619-24, una amarga lucha se entablo en Potosí entre el vecindario Vasco, usualmente mineros, y los Vicuñas, denominación que alcanzaba a la facción integrada por peninsulares no vascos, comúnmente no vinculados directamente con las actividades mineras. Esta lucha significó tal sangría que los esclavos africanos fueron requeridos para la tropa de los ejércitos privados. Por esta alta demanda de esclavos, vemos de nuevo en Buenos Aires una correlación muy estrecha entre los esclavos importados y fiados, barcos arribados y vendidos, carretas fletadas al Alto Perú, e indios alquilados. Sobre 60 barcos que entraron en ese período, 23 barcos fueron vendidos, 4.366 esclavos fueron importados, 60 carretas fueron fletadas, y 370 indios fueron alquilados.<sup>614</sup> Las importaciones se elevaron de \$31.574 en 1618 a \$136.115 en 1619 y totalizaron \$863.000 para el período 1619-24.<sup>615</sup>

La mayor parte del crédito de venta otorgado implicaba operaciones de esclavos. Entre 1621 y 1624, 472 esclavos valuados en \$87.000 fueron comercializados y 82 esclavos valuados en \$15.000 fueron transferidos.<sup>616</sup> El resto de la mercancía adelantada a crédito consistió en provisiones tales como vino Portugués y azúcar Brasilero, textiles para la indumentaria y hierro para las refinerías mineras del Alto Perú.

De resultas de haber conferido la corona española en 1624 un nuevo asiento para el tráfico de esclavos en el Portugués Manuel Rodríguez Lamego, que como siempre pasaba por Cartagena, los barcos que arribaban a Buenos Aires cayeron de 18 en 1623 a 2 en 1624.<sup>617</sup> El crédito de venta declinó también, cayendo en la mitad, de \$26.647 en 1623 a \$14.143 en 1624, antes de llegar al mínimo en 1625 con \$2.293, un monto menor a un décimo de la cifra de 1623. Las importaciones sufrieron, también, cayendo de \$108.028 en 1623 a \$8.105 en 1624.<sup>618</sup> Como uno de los resultados de esta temporaria crisis comercial el rol económico de ciertos mercados de las provincias interiores experimentaron un cambio drástico. En 1625, Santiago de Chile recobró de las manos de Córdoba la función perdida en 1593 como mercado redistribuidor de las importaciones Tucumanas.<sup>619</sup>

Muy pronto, en 1625, una vez que la recaptura de Bahía fue lograda y Pérez de Salazar dejó la gobernación, retornando a Charcas luego de dos años de servicio, el nuevo Gobernador Francisco de Céspedes, se complotó con Antonio de Oliveira Cadornega, asistente del Asentista Manuel Rodríguez Lamego, permitiendo a los contrabandistas

Portugueses comprometerse de nuevo en el comercio ilegal.<sup>620</sup> De 1626 a 1632, 44 barcos y 1.814 esclavos valuados en \$253.960 llegaron a Buenos Aires. El Gobernador Céspedes apoyó el tráfico sobre la base que la prohibición general de exportar plata causó un gran daño a las provincias del Río de la Plata. Sin la permisión de exportar plata, la población de Buenos Aires no podía sostenerse por si misma, aun si comerciaban con Sevilla.<sup>621</sup>

Una vez que el Atlántico Sur estuvo transitoriamente libre de la amenaza Holandesa, el mar Caribe devino el punto focal del conflicto marítimo. En 1628, la entera flota de galeones española fue abordada por los Holandeses, provocando también que las tasas de seguro marítimo se dispararan. De resultas de este gasto agregado en los costos del flete marítimo, los comerciantes de esclavos comenzaron a preferir las rutas marítimas del Atlántico Sur mas que aquellas del mar Caribe.

Tan pronto como un nuevo asiento fue asignado por la corona al hermano de Felipe IV, el Infante Fernando, arzobispo de Toledo, en 1631, el comercio esclavo resurgió. Inmediatamente el arzobispo vendió el asiento al comerciante genovés Nicolas Salvago.<sup>622</sup> Esta venta fue contratada con la peculiaridad que --como resultado de las hostilidades marítimas causada por la Guerra de los Treinta Años-- en lugar de estar obligados a llevar los esclavos a Cartagena a través del Caribe, debían ser embarcados a Buenos Aires a través del Atlántico Sur, una ruta marítima mucho más segura.

Al mismo tiempo, un cambio tuvo lugar en Buenos Aires, debido a la erosión política del Gobernador Céspedes, provocada por su comportamiento nepótico, que amenazaba la hegemonía del bloque en el poder. Un nuevo Gobernador, el General Pedro Estéban Dávila, asumió el cargo. Dávila era un guerrero corrompido por las miserias de la Guerra de los Treinta Años. Como secuela de este cambio político y económico, las relaciones políticas con los remanentes de la facción Confederada (compuesta esencialmente de contrabandistas) mejoraron radicalmente, consolidando el bloque en el poder.<sup>623</sup> El uso del crédito en Buenos Aires se incrementó y las importaciones de esclavos del África occidental y la inmigración de mano de obra indígena procedente de las provincias interiores revivió. Las importaciones se elevaron de \$19.579 en 1629 a \$31.598 en 1630, totalizando \$213.000 en todo el período.<sup>624</sup> El volumen del crédito de venta saltó de \$2.570 en 1628 a \$46.683 en 1631, totalizando \$158.000 para el período 1631-37.<sup>625</sup> De igual manera, el crédito de compra para las operaciones de adquisición de esclavos en África también se expandió en la década del 30. En Buenos Aires, durante esta década, siete propietarios de naves tomaron prestado un total de \$65.000 para este propósito.<sup>626</sup> También en este período, se dio una correlación muy estricta entre los esclavos importados y fiados, las carretas fletadas, y los indios alquilados.<sup>627</sup> Durante estos años, un total de 1.432 esclavos fueron importados, 32 carretas fueron fletadas a Chile y el Alto Perú, y 348 indios fueron alquilados para llevar los esclavos.

El ciclo expansivo en las transacciones crediticias alcanzó otra crisis en 1634 luego que Pernambuco fue temporalmente tomado por los Holandeses. Como lo ilustra la Tabla 2 del artículo citado, las importaciones de esclavos cayeron drásticamente, decreciendo de \$28.826 a \$7.240, o el 75%.<sup>628</sup> El crédito de venta en Buenos Aires también declinó a una tasa similar, cayendo de \$49.204 en 1633 a \$12.536 en 1634.<sup>629</sup>

Durante la gobernación de Dávila, debido a una mucho más homogénea política que no intentó romper el bloque en el poder, el contrabando y la corrupción de los funcionarios públicos alcanzaron niveles increíbles. Asumiendo que las políticas

financieras seguidas en el pasado por los comerciantes procedentes del Alto Perú y de Chile fuera continuada, se concluye inevitablemente que la corona debió haber sufrido un fraude tremendo. Si, de acuerdo a mis previos cálculos, el 20% de la mercancía importada fue comprada a crédito, casi un millón de pesos en mercancías deben haber sido importadas.<sup>630</sup> Sin embargo, los funcionarios aduaneros declararon solo \$213.000. El 33% de los gravámenes aduaneros fueron defraudados. Más tarde, en 1639, para evadir el fraude aduanero, el Visitador Juan de Palacios, enviado por la Real Audiencia de Charcas, emitió un acuerdo para reducir el precio fiscal de cada esclavo de mas de 15 años de edad desde \$70 a \$57,6 incrementando así los ingresos Reales.<sup>631</sup> La decisión de Palacios para disminuir la valuación fiscal del esclavo estimuló el tráfico esclavo.

Desde que un gran número de licencias quedaron disponibles del último asiento administrado por el Arzobispo de Toledo un par de transacciones alrededor de estas licencias tuvieron lugar en España. Estas licencias fueron primero adquiridas por Martín Alfonso de Atayde quien, al mismo tiempo, las vendió en 1638 a Nicolás Salvago.<sup>632</sup> Como resultado del comercio desatado por estas licencias en el periodo 1640-42, el valor de los esclavos importados alcanzaron \$64.338, el crédito de venta alcanzó \$175.275, y el monto de esclavos para los cuales los gravámenes Reales fueron pagados se elevó a \$1.660.

Sin embargo, a pesar de este boom comercial, las rutas comerciales para el tráfico esclavo durante la década de 1630 y comienzos de la de 1640 cambiaron debido a la gran rebelión Calchaquí.<sup>633</sup> Comerciantes como Cristóbal de Ahumada, Manuel Gómez, Juan Jofré de Arce, Francisco Núñez de Villoldo, Felipe Ramírez de Arellano y Luis de Toro Macote se comprometieron en el comercio esclavo de larga distancia con Lima a través de los Andes.<sup>634</sup>

Esta larga y próspera situación se revirtió en 1642 cuando el Gobernador Gerónimo Luis de Cabrera, el yerno de Hernandarias, tomó el poder y comenzó --debido a la Guerra de Independencia del Portugal contra la dominación española-- a procesar judicialmente a los comerciantes Portugueses. Dicha guerra había sido a su vez consecuencia de la gran sangría que venía sufriendo la corona español, en especial los territorios pertenecientes a la órbita portuguesa como el norte de Brasil, con la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), cuyo escenario principal fueron los Países Bajos, y de cuyas resultas se firmó en 1648 la Paz de Westphalia. Como resultado, las importaciones se desplomaron de \$49.750 en mercancías en 1641 a \$1.853 en 1642. El crédito de venta cayó de \$94.445 en 1640 a \$14.582 en 1641. El número de carretas fletadas cayó de 24 en 1640 a 7 en 1641. Las importaciones de esclavos y los conciertos de indios también experimentaron una caída. En 1641, el último año próspero de este ciclo, los esclavos legalmente importados montaron a 175 y los indios bajo concierto alcanzaron a 21.<sup>635</sup>

El siguiente período de crisis comerciales, sin embargo, no fue un constante período de estancamiento. En 1648 y 1649, aunque la producción de plata en los yacimientos Alto-peruanos experimentó una repentina y corta recuperación, gracias a un incremento en las importaciones de azogue (mercurio), las públicas remesas de plata de Lima a España fueron cortadas a la mitad. En efecto, mientras los gravámenes por esclavos pagados a la Cajas Reales de Potosí se elevaron de \$551.034 pesos ensayados de 450 maravedíes en 1647 a \$694.659 pesos en 1648, y \$661.200 pesos en 1649, o un incremento de corto plazo del 25%, las públicas remesas de plata de Lima a España decrecieron de \$1.800.000 en 1647 a \$956.000 en 1648.<sup>636</sup>

Este repentino incremento en la producción de plata mas los continuos fraudes en la ceca de Potosí, y el creciente contrabando de plata a través de Buenos Aires generó en esta última un proceso inflacionario de corto plazo. En 1652, el ensayista de la ceca de Potosí fue hallado culpable de defraudar a la corona por un monto superior a los \$472.000.<sup>637</sup> Debido a estos vastos fraudes, el Virrey de Lima, Conde de Salvatierra, ordenó en Septiembre de 1652 la ejecución de la Real Orden de octubre de 1650, que había establecido una reacuñación de la moneda de plata valuada en 7 1/2 reales por peso y simultáneamente una reacuñación de la moneda de plata devaluada en seis reales por peso.<sup>638</sup> Para los consumidores, esta regulación significó una pérdida equivalente al 25% del poder de compra del dinero. Estuvo puesta en efecto por ocho meses, de septiembre de 1652, y durante ese tiempo fue responsable de un increíble fraude practicado por el Gobernador Lariz. Lariz, de acuerdo con Levene, ocultando la Real Pragmática, fue capaz de beneficiarse de la diferencia entre ambas monedas. Finalmente, como los acreedores se rehusaron a aceptar monedas envilecidas en pago por deudas pasadas, el Presidente de la Audiencia de La Plata (o Charcas) fue obligado a poner en vigor la circulación de las nuevas monedas de plata.<sup>639</sup> Como una inmediata salida de estas políticas inflacionarias, los ahorros en Buenos Aires se desviaron desde un campo incierto pero de una alta tasa de interés como los préstamos personales, a un campo más seguro pero de más bajas tasas de interés como el crédito hipotecario rural. De repente, como resultado de un incremento del 25% en la renta hipotecaria surgida de la aplicación de la Real Pragmática en 1652, el monto total del dinero prestado a través de hipotecas alcanzó los \$5.507.<sup>640</sup>

El efecto neto de las actividades de los funcionarios de la ceca volcados al fraude fue también la de volver las importaciones de la Europa Occidental muchos más costosas en términos de esta inferior moneda. Los comerciantes que exportaban al área, los que aspiraban a retornar a su país con similares ganancias tenían que recaudar más cantidad de la moneda envilecida, que la que lograban antes del fraude. Los comerciantes que exportaban a Buenos Aires fueron forzados a elevar sus precios. La reducción del poder de compra de Buenos Aires fue inevitablemente acompañado por una reducción en la demanda. De igual manera, de resultados de la circulación forzada de esta nueva moneda, una ola de quiebras asolaron Sevilla, Madrid y Toledo en 1655, para detrimento de una gran cantidad de frágiles comerciantes que habían atesorado la moneda fraudulenta.<sup>641</sup> De los tres Maestres de Plata que se declararon en quiebra en Sevilla en 1655, dos buscaron refugio en Lisboa y el otro fue encarcelado en Sevilla. El caso más famoso fue la quiebra de Domingo Ipeñarrieta, el Maestre de Plata de la flota del General Mencos.<sup>642</sup>

#### **I-IV Los períodos de guerra y paz en el comercio (siglo XVIII).**

Y durante el siglo XVIII, en toda América Latina, las crisis comerciales reaparecieron sistemáticamente, particularmente en Buenos Aires, cada vez que la decadente y débil metrópoli española encaró militarmente el creciente dominio del imperio británico. Ocurrió en las Guerras de Sucesión de España (1703-1715) y de la Sucesión de Austria (1739-48); en la de los Siete Años (1762-63), en la de la Independencia Americana (1778-83), y finalmente en las guerras Napoleónicas (1796-1803). Con las guerras, se produjeron nuevas delimitaciones geográficas, desplazamientos del monopolio del tráfico de esclavos, e intercambio de enclaves estratégicos. Para el caso, con la Paz de Utrecht en 1713, Inglaterra desplazó a Portugal del monopolio de la trata esclava en toda América a favor del Real Asiento de Inglaterra, y la corona Española perdió los Países Bajos españoles (Bélgica), Cerdeña, [Nápoles](#), [Sicilia](#) y el [Milanesado](#).

Siempre que la guerra ocurría entre las dinastías Borbónicas de Francia y España, por un lado, y la monarquía Inglesa, garante de la independencia de Portugal, por el otro; la Colonia del Sacramento era tomada por la fuerza; el comercio monopolista al multiplicarse las tasas de riesgo marítimo se desplomaba; el premio de la moneda doble (de ocho reales) caía; el monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico aumentaban; y la sede del contrabando se trasladaba de la Colonia del Sacramento a Buenos Aires. Buenos Aires mismo devino en tiempos de guerra en una colonia periférica, provista por las Cajas Reales de situados o subsidios con fines militares, donde la alianza mercantil se fragmentaba incrementando la presencia de una embrionaria burguesía comercial de origen local constituida por contrabandistas criollos, donde los arrendamientos urbanos y rurales se deprimían arrastrando consigo a la construcción urbana, y donde la autonomía relativa de la burocracia político-colonial se expandía. Por otro lado, la llegada de los caudales a España en tiempos de guerra amortiguaba la inflación que sufrían en la misma Europa los vales reales.

Es así que en tiempos de guerra, los precios de los productos importados y el flete marítimo sufrían una espiral inflacionaria, de tal suerte que los stocks de tiendas y almacenes se mestizaban con productos locales y el salario y la renta urbana se desfasaban. De igual modo, cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su premio en el canje por moneda corriente o sencilla.<sup>643</sup> La demanda de moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario, aumentaba. De cualquier forma, y a pesar de la carestía de la mano de obra, el efecto del alza de precios de los productos importados --para los comerciantes que mantenían intactos sus stocks de mercancías-- habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos, creando sin duda una inflación de ganancias que favoreció al estrato mercantil a expensas de los rentistas urbanos y de los asalariados y jornaleros. Más aún, los tiempos de guerra indujeron a la corona, en su afán de recaudar ingresos genuinos, a enagenar los oficios públicos a comerciantes criollos o españoles residentes en las colonias, generando como secuela involuntaria un creciente patrimonialismo en la burocracia civil, tan endeble como incipiente. Para algunos el dinero-mercancía (moneda doble) retirado del circuito oficial en virtud de la crisis del comercio exterior, en vez de ser asignado al mercado interno habría sido transferido al exterior a través de circuitos no oficiales. El mercado de bienes de consumo (yerba, vino, tabaco, ganado, etc.), el mercado de bienes de inversión o renta (ingenios, trapiches, haciendas, chacras, estancias, oficios públicos, casas, y esclavos) y la constitución de capellanías sobre bienes raíces, no se habrían visto beneficiados por las crisis del comercio exterior.

Resumiendo, reconocemos en la primer parte del siglo XVII, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Los primeros dos períodos de expansión tuvieron lugar cuando los contratos de asiento para el tráfico esclavo fueron firmados por el Rey de España y las medidas represivas anti-intérlopes fueron removidas. Esto ocurrió en 1593-98 y 1605-06. El tercer período de expansión (1613-15) resultó no solo del fracaso de los comerciantes de Lisboa y Sevilla para alcanzar un acuerdo en el negocio del asiento sino también del hecho que el gobierno de Buenos Aires estaba siendo conducido por intereses orientados hacia el mercado externo. Los tres últimos períodos de expansión ocurrieron debido a los asientos y registros contratados específicamente para llevar esclavos y mercancía Europea a Buenos Aires. Ellos cubrieron los años 1619-23, 1631-36, y 1640-42. Y las crisis económicas ocurrieron en Buenos Aires siempre y cuando ambas

burguesías mercantiles de Sevilla y Lisboa alcanzaban un acuerdo para conducir el tráfico esclavo por Cartagena o duras políticas proteccionistas eran ejecutadas por las autoridades coloniales de Buenos Aires, como en 1608-10, 1615-18, y 1624-30. También ocurrieron cuando las fuentes Africanas que proveían con esclavos estaban exhaustas, o cuando los asientos contraídos específicamente para transportar esclavos a Buenos Aires expiraban, como en 1637-39, o cuando los constreñimientos externos directos amenazaban las rutas del Atlántico Sur, como en 1616, 1634 y 1637.

Y en el siglo XVIII, una vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a estar directamente ligada al mercado mundial, como en la primera mitad del siglo XVII, descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de desarrollo mercantil.-absolutista. En este período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981, 1985), y repetido por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al período que lo precedió.<sup>644</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue el más significativo de todos, no ha merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.<sup>645</sup>

## Capítulo I-C-10

### **Reparto forzoso de mercancías y presiones mercantiles**

#### Índice

- J-I Navíos de registro.
- J-II Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas.
- J-III Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes.
- J-IV Habilitación mercantil.
- J-V Cesión de créditos.
- J-VI Endogamia mercantil.
- J-VII El caso del Alto Perú.
- J-VIII Alianzas inter-étnicas.
- J-IX Regiones subsidiarias del Alto Perú.
- J-X Mercado del reino de Chile.
- J-XI Mercado Cuyano.
- J-XII Mercado cordobés.
- J-XIII Mercado litoraleño.
- J-XIV El caso de los viáticos.
- J-XV Mercado de la Banda oriental.

## **Introducción del capítulo I-C-11**

A diferencia de aquellos autores para quienes la formación de una conciencia nacional depende de la gestación de una identidad religiosa, lingüística y étnica,

Assadourian (1972, 1983) sostuvo que para comprender el proceso de creación y configuración de los estados nacionales --que surgieron en el Cono Sur de América Latina en el siglo XIX-- era preciso evaluar el rol cumplido por la articulación del espacio colonial peruano a comienzos del siglo XVII, que por cierto incluía todo lo que fue el antiguo Virreinato del Río de la Plata.<sup>646</sup> La numerosa presencia de comerciantes peninsulares a fines del siglo XVIII en dicho espacio colonial, habría acentuado el proceso de diferenciación social, desestabilizado la sociedad colonial y condicionado la expansión del dominio sobre espacios geográficos cada vez más extensos y el desarrollo de métodos cada vez más coactivos para aceitar la circulación de mercancías (repartos forzosos por parte de los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos, los Protectores de Naturales y los Comandantes de Armas).

En dicho proceso de diferenciación social se fueron distinguiendo una burguesía comercial comisionista y una creciente burguesía comercial local no encolumnada con las estructuras corporativas y patrimonialistas del orden imperial-absolutista. El poder de la burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar el rubro más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de: a) las mercancías europeas, b) los esclavos introducidos desde Brasil y Angola, y c) la mercancía-moneda americana. Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil-absolutista. Pero, la progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes monopolistas. La alianza de grupos mercantiles organizada bajo la hegemonía de la gran burguesía comercial monopolista habría incorporado, en una posición subordinada cada vez que había paz entre España e Inglaterra, los intereses de otras minorías comisionistas de origen local, representadas en el último período colonial por los Jueces Diputados del Consulado de Comercio.

A través de esta alianza, la gran burguesía comercial monopolista lograría redefinir un modo de inserción en la estructura comercial colonial, y amortiguar las incertidumbres del comercio a larga distancia mediante instituciones tales como el seguro y el cálculo contable, permitiéndole con este modelo de articulación lógica, entre producción y circulación, configurar un espacio colonial propio, obteniendo así una cuota mayor del excedente.<sup>647</sup> Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del rol del crédito mercantil en el comportamiento cíclico de los mercados de mercancías,<sup>648</sup> y numerosas investigaciones de otros autores,<sup>649</sup> los vecinos comerciantes porteños y sus consignatarios del interior revelarían una intensa movilidad y una profunda inestabilidad social.

Para explorar el paradigma historiográfico presentado trataremos de verificar, a diferencia de una visión porteñista del comercio Rioplatense (Socolow, 1978), otra visión más integradora del comercio colonial, que verifique de qué modo en tiempos de crisis o desequilibrios del comercio exterior, las minorías comisionistas subordinaron el poder económico y político de las incipientes burguesías mineras y agrarias, consolidaron una heterogénea estructura social y relativizaron la autonomía política de la burocracia colonial. Este proceso habría facilitado la satelización de sus *hinterlands*, sometiendo al capital minero y agrario, reforzando los patrones de comportamiento colonialista, y habría frustrado así el origen de un proceso acelerado de emancipación económica continental. En este modelo la lucha intra-colonial habría tomado lugar de una manera dual entre fracciones de la burguesía colonial, donde por un lado, los comisionistas del monopolio español estrechamente ligados a la economía minero-exportadora serían aliados de la

embrionaria burguesía minera Alto peruana (azogeros potosinos) y por el otro lado, la incipiente burguesía comercial porteña, vinculada al tráfico interlope (contrabando) y a la exportación de cueros, sería aliada de las minorías terratenientes. La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era muy incipiente y ambigua, y se habría hallado subordinada a la contradicción que existió entre la elite colonialista (burocrático-monopolista) y la elite insurgente (terrateniente-burguesa).

Entre la gama de fenómenos históricos a discutir podemos mencionar el dinamismo de los mercados de mercancías, la densidad de las redes mercantiles y de parentesco, y los grados de endeudamiento, permanencia y cumplimiento mercantil. Y entre la gama de problemas históricos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo:

- a) entre la densidad de las redes mercantiles y la amplitud de los espacios coloniales penetrados;
- b) entre la permanencia o perdurabilidad generacional de sus actores y la densidad de las relaciones de parentesco;
- c) entre la lucha intra-colonial y la representación en las Diputaciones provinciales del Consulado de Comercio de Buenos Aires;
- y d) entre la profundidad de las crisis comerciales y la frecuencia de los cobros de pesos, los concursos y las quiebras.

Resolver esta complicada e interrelacionada serie de problemas históricos implica investigar un intrincado tejido documental. Por ejemplo, la densidad de las redes mercantiles podrá deducirse del número de localidades geográficas y la frecuencia con que eran cubiertas por las escrituras del fiado de Castilla, los poderes generales y los poderes especiales para cobrar deudas,<sup>650</sup> las cesiones de créditos que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro,<sup>651</sup> y las escrituras de declaratoria.<sup>652</sup> El endeudamiento mercantil podrá deducirse del cómputo de las escrituras de fiado de Castilla; y el cumplimiento mercantil de las moras registradas en los márgenes de las escrituras de fiado, y de las cancelaciones practicadas en Buenos Aires de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España. Y las crisis comerciales podrán deducirse del número y monto de las cesiones de deudas, finiquitos, compromisos, transacciones, ajustes y convenios concertados. En este trabajo consideraremos la emisión por parte de los comerciantes de las escrituras de obligación o fiado de Castilla y no las compensaciones contables o los vales privados o extra-notariales. Esta documentación se escrituraba sin la presencia de fiador y sin garantía prendaria o hipotecaria alguna. Su única garantía era la punición del 8% a partir de su incumplimiento o mora.

A los efectos de realizar este estudio fue preciso relevar durante largos años una inmensa masa de datos de los protocolos notariales de Buenos Aires, de los Registros de Caudales de los Buques-Correo y de los repositorios judiciales.<sup>653</sup> Ella consistió básicamente en las infinitas escrituras de fiado de Castilla que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial; en las numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor; en las cancelaciones de las escrituras de fiado que los deudores o sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las escrituras de declaratorias por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos; en los poderes para cobrar que los acreedores libraban desde Buenos Aires; en los

asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo; y en los juicios por cobro de pesos depositados en las series Tribunales, Comerciales, Hacienda, Justicia e Interior, pertenecientes a la División Colonia del Archivo General de la Nación (AGN). Para ello tuvimos que ordenar miles de escrituras o asientos por consignatario o cliente, o por remesante, por comerciante acreedor, por cesionistas y cesionarios, y por lugar de origen de los consignatarios o clientes. Este ordenamiento en apéndices nos permitió a su vez elaborar cuadros y gráficos estadísticos. Lamentablemente, para el estudio de la frecuencia con que eran cubiertas diversas localidades geográficas por las escrituras del fiado de Castilla, no hemos podido consultar por falta de medios, los protocolos notariales de las cabeceras provinciales del interior del país y de Bolivia y Paraguay, y poder así hacer un seguimiento de cada partida o memoria. El problema metodológico que se nos plantea, es entonces el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen, valor e intensidad o frecuencia de los cambios de destino geográfico del crédito mercantil.

### **J-I Los navíos de registro.**

En cuanto a los navíos de registro, sus licencias de internación de la mercancía importada hay que interpretarlas restrictivamente, por cuanto éstas estaban apremiadas por plazos fijos para concretar las ventas ordenadas por el Gobernador de Buenos Aires, en respuesta a requisitorias del Virrey de Lima.<sup>654</sup> De acuerdo con el Cuadro D-I, en 1748, el comerciante que vendió a crédito la mayor parte de la mercancía Europea, fue Joseph Vienne,<sup>655</sup> quien contrajo 57 operaciones por un monto de \$432.000, representativo del 29% de la totalidad del crédito mercantil. Continuaban en la lista Francisco Gutiérrez Franco y Pedro Cranisbro con un 12%, y Joseph Iturriaga con un 10%. En 1749 el primero en la lista de importadores fue Manuel de Olivera Braga con \$544.859, 15% del total del crédito mercantil, seguido por Joseph Vienne con el 8%. En 1751 la lista fue encabezada por Manuel del Arco con \$574.857, 11% del total del crédito mercantil, seguido por José de la Peña Fernández y Juan Arias Argüello con el 4%. Esta lista de posiciones cambió anualmente durante la década del 50. De aquí que, en 1752 vemos a Francisco Álvarez Campana encabezando la lista seguido por Manuel del Arco, Pedro José Doye, y Ramón de Palacio y Manuel Sánchez de Cueto en el segundo, tercero, y cuarto lugar respectivamente (Cuadro D-I).

En la metrópoli peninsular, el grupo de comerciantes gaditanos que comerciaba con 26 puertos americanos era extremadamente numeroso alcanzando según Bernal (1992) a 2.629 comerciantes, que protocolizaron entre 1760 y 1800 unas 33.000 escrituras de riesgo marítimo o préstamos a la gruesa ventura por 185 millones de pesos.<sup>656</sup> De estos 2.629 comerciantes, sólo 183, o el 6%, comerciaron a partir de la Paz de Aquisgrán (1748) con el Río de la Plata.<sup>657</sup> Si en lugar de calcular el porcentaje de comerciantes que operaban en el Río de la Plata sobre la base del total de comerciantes gaditanos, lo calculamos sobre la base de los 85 grandes comerciantes,<sup>658</sup> señalados por Bernal en su Cuadro 6.52, donde 35 individuos comerciaban con el Río de la Plata, el porcentaje sube a casi la mitad (el 41%). Pero a su vez, los 183 comerciantes gaditanos, que adelantaban mercadería a crédito al Río de la Plata, fueron en número el doble de los comerciantes residentes en Buenos Aires, que comerciaban con los puertos de España. El Apéndice A-I detalla la nómina de sus integrantes. También detalla dicho Apéndice las vinculaciones mercantiles de este grupo con los comerciantes residentes en el cono sur que traficaban a través de Buenos Aires.<sup>659</sup> Incluso algunos de ellos contaban con representantes y habilitados en otras ciudades cabeceras de Virreinato. Pardo y Freyre y Cía., Francisco Xavier de los Ríos, J. J. Palomo,

y Blanca María Utrera, titulares de casas comerciales de Cádiz, mencionados en el Cuadro D-II y en el Apéndice A-I, contaban en 1752 con representantes y clientes no sólo en Buenos Aires sino también en México.<sup>660</sup> De los 85 comerciantes, financieros e intermediarios más representativos del comercio de Cádiz entre 1760 y 1824 que figuran en el Cuadro 6.52, publicado por Bernal (1992), 30 de los mismos o el 35% comerciaban con Buenos Aires. El Cuadro D-II ilustra la nómina de los Comerciantes de Cádiz que otorgaron créditos a comerciantes de Buenos Aires, entre 1760 y 1810, con mención del número y monto de las transacciones celebradas.

A partir de esta declaración de Paz (1748), la nómina de los integrantes del Comercio Porteño y las cancelaciones de sus operaciones con comerciantes acreedores residentes en España (1748-1778) se consignan en el Apéndice A-II. De los integrantes del comercio porteño, que adelantaron mercadería fiada al interior del espacio colonial, luego de la Paz de Aquisgrán (1748), se destacaron Manuel del Arco,<sup>661</sup> Pedro de Lea y Arco,<sup>662</sup> Antonio de Arriaga,<sup>663</sup> Juan de Eguía,<sup>664</sup> y Alfonso de Guzmán y Mendoza.<sup>665</sup> De la información que se posee, en muy pocos casos se dieron entre ellos vínculos de parentesco. Por ejemplo, Don Pedro de Lea y Arco era sobrino de Lorenzo del Arco y primo hermano de Manuel del Arco, y Antonio Arriaga era hermano del monopolista Pedro Arriaga. Los vínculos que estos comerciantes mantenían con numerosos clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile, ilustrados en el Apéndice A-III, eran en número y valor, en la mayor parte de los casos, mayores a los vínculos celebrados con los comerciantes gaditanos, en virtud de los incrementos producidos por la mercadería contrabandeada desde la Colonia del Sacramento. El Apéndice A-IV trae la lista de estos comerciantes con el balance de los valores totales de las operaciones contraídas en España, de las operaciones contraídas con el interior del espacio colonial, y de las operaciones de cesiones de crédito concertadas. Por ejemplo, mientras Pedro de Lea y Manuel del Arco cancelaron una veintena de transacciones con España por valor de 232.000 pesos dobles, alcanzaron a celebrar con el interior del espacio colonial más de un centenar de operaciones por un valor cinco veces mayor. Finalmente, a estos mercaderes se suman aquellos otros comerciantes, que sin comerciar con Cádiz practicaban intensamente el contrabando.<sup>666</sup> Este último grupo, listado en el Apéndice A-V, estaba constituido por Francisco Álvarez Campana,<sup>667</sup> Francisco Pérez de Saravia,<sup>668</sup> Roque de San Martín,<sup>669</sup> Carlos de los Santos Valente,<sup>670</sup> y Manuel de Olivera Braga.<sup>671</sup> Según el Apéndice A-V este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

Por último, los Cuadros D-III, D-IV y D-V nos revelan, para una considerable cantidad de comerciantes, el balance de las operaciones contraídas con el interior del espacio colonial y las cantidades y montos de las remesas de monedas de plata y oro enviados a España.<sup>672</sup> En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio exterior porteño legal quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias Portuguesas. El contrabando había alcanzado entonces los niveles más altos. En la columna del fiado del Cuadro D-V, el nivel de actividad mercantil observado durante los años de guerra (1778-83) revela la probable participación en el comercio intérlope de comerciantes de la talla de Manuel de Basavilbaso, Domingo Belgrano Pérez, Francisco Antonio de Escalada, Antonio García López, Luis de Gardeazábal, José González de Bolaños, Pedro González de Cueto, Bernardo Sancho Larrea, Juan Antonio de Lezica, Manuel Rodríguez de la Vega, José de San Pedro Lorente, Xavier Saturnino Saraza, Martín de Sarratea, y Francisco de Seguro.<sup>673</sup>

## **J-II Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas.**

En la mayor parte de los Corregimientos y Comandancias del Alto Perú y el Paraguay, el trato de los comerciantes era con los Corregidores y Comandantes del lugar. En esto el Alto Perú y el Paraguay se asemejaban notablemente a la descripción de Oaxaca, en el Virreinato de Nueva España, hecha por Borchart de Moreno (1984) y por Kicza (1986).<sup>674</sup> La provisión de los Corregimientos de Indios y de las Comandancias de Armas, a diferencia de las Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada, la cual era distribuida en los llamados repartimientos forzosos.<sup>675</sup> Para poder acceder a dichos cargos, y poder alcanzar los lugares de destino, los beneficiarios de los mismos, hipotecaban por lo general sus cédulas de nombramiento.<sup>676</sup> De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos eran los que estaban a cargo de los repartimientos forzosos. En la Lista A-I constatamos que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir hacía sus burocráticos y lucrativos destinos.<sup>677</sup> Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos corregidores, acuciados por el desfase entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la defraudación y el cohecho.<sup>678</sup>

## **J-III Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes.**

Asimismo, en la mayor parte de las provincias que constituían el Virreinato del Río de la Plata, el trato de los comerciantes solía ser con los Curas Párrocos, los Alcaldes de Hermandad y los Comandantes de Armas. El abuso con que en el Alto Perú y el Litoral eran cobrados los derechos eclesiásticos, muchas veces mediante la comparecencia de los Comandantes de Armas, dio lugar a que las autoridades civiles motejaran a las primicias, oblacones y limosnas de verdaderos repartimientos forzosos. El ex-Cura Párroco de Luján y posterior Cura y Vicario de Corrientes, Maestro Ignacio Ruiloba, fue denunciado en 1736 por numerosos testigos de haber llevado a Corrientes para su posterior comercialización diversos géneros, de "...lo que le rindió el Curato de Luxán y el Producto de las Casas que se bendieron a Don Gerónimo de Escobar".<sup>679</sup> El Paraguay descrito por Garavaglia (1983), se asemejaba notablemente a la descripción del Perú, Chile y el Alto Perú, hecha por Tord Nicolini (1974), Carmagnani (1973, 1975) y Moreno Cebrián (1976).<sup>680</sup> Como gran parte de las partidas, facturas o memorias de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos de fortines o guardias de frontera, los Gobernadores en sus Visitas fomentaban las licencias para beneficiar cueros o yerba, en las Entradas al Desierto o en los yerbatales silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos pudieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban sujetos.<sup>681</sup>

## **J-IV La habilitación mercantil.**

Los comerciantes habilitados, se desparramaron por todo el ámbito del espacio colonial, sumando en los cinco períodos históricos seleccionados (1713-1810) un total de 2.500 mercaderes. Desagregando esta última cifra, en las regiones mineras del Alto Perú se registraron un total de 389 mercaderes, en las provincias del Noroeste (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) 511 mercaderes, en Chile 332 mercaderes, en Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) 321 mercaderes, en Córdoba 304, y en el Litoral

(Santa Fé, Corrientes, Paraguay y Banda Oriental) 663 mercaderes. Los Gráficos D-I al D-XV, fundados en el Cuadro D-VI, nos revelan para cada período histórico y para cada cabecera de provincia, el número de comerciantes y de sus operaciones, así como el monto alcanzado por las mismas. Esta información está fundada a su vez en una cuarentena (38) de Apéndices, enumerados desde el B-I al B-XXV, los cuales nos ilustran acerca de la identidad de estos comerciantes, residentes en el interior del espacio colonial, el número de sus operaciones de fiado contraídas en Buenos Aires, las fechas entre las cuales operaron, el número de años que permanecieron en el ramo, los respectivos montos adeudados, sus relaciones de parentesco y los litigios padecidos o impulsados. La elección del espacio geográfico y del período tienen la misma razón de ser que tuvo para Assadourian (1972,1983) la elección del espacio colonial peruano del siglo XVII: "...comprender el proceso de creación y configuración de los estados nacionales que surgen en el siglo XIX".<sup>682</sup> Los cinco períodos históricos seleccionados en este Cuadro fueron aquellos que nacían con un Tratado de Paz y culminaban con una declaración de guerra y/o su respectivo Tratado de Paz. El primer período fue aquel que nació con la Paz de Utrecht (1713) y se extendió hasta la Paz de Aquisgrán (1748). El segundo, el que se extendió desde este último acontecimiento hasta la Paz de París (1763). El tercero, desde esta última hasta la Paz de Versailles (1783). El cuarto, desde esta última y la aplicación del Reglamento de Libre Comercio hasta la Primer Guerra de Coalición contra la Francia Revolucionaria (1791). Y el quinto y último desde esta última fecha hasta la misma Revolución de Mayo (1810).

#### **J-V La cesión de créditos.**

Como hemos adelantado anteriormente la extrema demora en cancelar muchas operaciones de fiado originaron el uso generalizado de la cesión de créditos. Los Cuadros D-VIII y D-IX nos informa de dichos montos, a lo que se debe agregar los plazos y las fechas de cancelación. La nómina de cedentes y cesionarios, muchos de ellos lisa y llanamente especuladores --pues en algunos casos vuelven a ceder por segunda y hasta tercera vez el mismo documento de crédito-- que operaron en Buenos Aires durante el siglo XVIII, están ilustrados en el Cuadro D-VIII. Entre los cesionarios se destacó el Administrador del Correo Domingo Basavilbaso, apoderado de la gaditana María Terrero y Básquez, quien entre 1752 y 1757 adquirió de la compañía formada por Roque San Martín y Antonio de Guzmán y Mendoza cerca de medio centenar de obligaciones por valor de \$236.000. Los cedentes o cesionistas San Martín y Guzmán habían vendido a crédito en 1753, a Juan Bautista de Alquizalete, Baltasar de Azevey y Juan Garrido, entre otros muchos comerciantes del interior, mercaderías por valor de \$137.000. En 1761, por ejemplo, once años después de que Pedro Mansilla concertara ciertas operaciones de fiado, el Gral. Antonio de Rueda tuvo que atajar a un tal Pedro Carvajal,<sup>683</sup> interponiendo su doble facultad de Corregidor y apoderado del acreedor, obligándolo a que no saliese de Cotagaita "...en sus pies ni en los ajenos" hasta que no le entregase \$1.000 a cuenta de lo que le debía a Mansilla, deuda que a su vez fue cedida por Mansilla a Manuel de Escalada. Para obtener su libertad Carvajal se vio precisado a firmar un conocimiento o recibo por dicha cantidad "...sin que en realidad de verdad yo los hubiese recibido".<sup>684</sup> El propio Carvajal, conciente de la anómala dualidad que exhibía el Corregidor, apunta en su denuncia que Rueda interpuso "...las facultades de Corregidor no obstante ser apoderado".<sup>685</sup> Lamentablemente, desconocemos cuán arraigada estaba esta estrategia de los acreedores de librar poderes especiales para cobrar deudas a Corregidores y otras altas autoridades reales, asentados en las ciudades donde residían los deudores. Para ello sería

preciso hacer un detallado estudio de la totalidad de los poderes librados en Buenos Aires en dichos años.

Cada una de las sub-regiones del espacio colonial Rioplatense sufrió a lo largo de los períodos seleccionados fuertes altibajos, absolutos y relativos, en el tráfico comercial, que en este trabajo estudiaremos detenidamente. El Alto Perú, un enclave minero altamente relevante en el consumo de la mercadería de Castilla fiada al interior, experimentó entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62), según el Cuadro D-VI, la duplicación del número de comerciantes, la cuadruplicación del número de operaciones, y la triplicación del volumen de las mismas. En el tercer período (1763-82) experimentó una retracción abrumadora en la demanda, habiéndose reducido a la cuarta parte de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90), con la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, repuntó nuevamente, pero si bien nunca volvió a registrar el movimiento record del segundo período, alcanzó cantidades y guarismos del orden de la mitad de dicho período record. El quinto y último período (1791-1810) volvió a registrar una retracción, con 61 comerciantes, pero nunca tan acentuada como la del tercer período. En este período, en la Diputación del Consulado de Comercio de La Paz, se matricularon según Tjarks (1962), 41 individuos, sin discriminar el rubro; en la Diputación de La Plata: 26 comerciantes de efectos de Castilla y 31 de géneros de la tierra; y en la Diputación de Potosí: 33 comerciantes de efectos de Castilla, 15 de efectos de la tierra, y 15 indios vecinos traficantes en coca.<sup>686</sup> Esta matriculación totalizó un centenar de comerciantes de efectos de Castilla, cuarenta individuos más de los detectados en el fiado de Castilla contraído en Buenos Aires.<sup>687</sup> Pero a diferencia de las Diputaciones de las provincias Abajeñas, sólo una pequeña minoría de los comerciantes Alto-peruanos alcanzaba a endeudarse en Buenos Aires. La mayoría de los matriculados lo hacía, aparentemente, en Jujuy, Salta o Tucumán. En La Paz, para el período 1771-1780, de los 38 comerciantes registrados por Jáuregui Cordero y Pérez Velasco (1993), sólo tres operaron con Buenos Aires; y para el período 1791-1810, en la Diputación de La Paz, de los 41 individuos matriculados, sólo dos comerciantes, tomaron mercadería a crédito en Buenos Aires,<sup>688</sup> y en la Diputación de La Plata, de los 26 individuos matriculados como mercaderes de efectos de Castilla solamente dos comerciantes, tomaron mercadería a crédito en Buenos Aires.<sup>689</sup> En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-I, un total de 389 comerciantes residentes en Potosí, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 200 o casi la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 97 o la cuarta parte, perduraron de 2 a 5 años; 77, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 5%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Francisco Rodríguez de Vida con 49 años de actividad, seguido por Domingo Ferrando con 38 años,<sup>690</sup> y Miguel Alexo Arpide con 37 años.<sup>691</sup>

## **J-VI Endogamia mercantil.**

Otros comerciantes se perpetuaban por lazos de parentesco. El estudio genealógico de los designados como Jueces Diputados y de los matriculados en las Diputaciones provinciales del Consulado de Buenos Aires revela la intensa endogamia practicada por los mercaderes. Si bien en el primer bienio de vida (1794-96), los Diputados del Consulado fueron elegidos por el Virrey, con posterioridad fueron elegidos por los cónsules, dos en cada bienio, a partir de la lista enviada por la Diputación respectiva --por lo general compuesta por una decena de comerciantes-- quienes elegían un candidato cada uno, y de ambos se sacaba a suerte.<sup>692</sup> Por lo que se va a ver, los Priors, Síndicos, Cónsules y Conciliarios de Buenos Aires no trepidaban en elegir como Diputados en el interior del

espacio colonial -- con similares facultades que los Piores y Cónsules-- a quienes se hallaban entre sí emparentados.<sup>693</sup> Tampoco dudaban en elegir a sus propios consignatarios o deudores.<sup>694</sup> Las autoridades de los Tribunales del Consulado estaban inhibidas de votar entre parientes.<sup>695</sup> Sin embargo, esta prohibición no se extendía a la facultad de matricularse.<sup>696</sup> Las notas de los Apéndices B-I al B-XXV nos brindan la información genealógica que nos permite detectar los parentescos políticos de los comerciantes, que los apellidos obviamente ocultan.<sup>697</sup>

## **J-VII El caso del Alto Perú.**

En cuanto a la subordinación en que se hallaban los comerciantes provenientes de Buenos Aires respecto de las autoridades del enclave minero del Alto-Perú, debemos destacar los casos de los Corregidores-comerciantes Antonio de la Calzada y Antonio de Rueda. El del primero, el Corregidor de Omasuyos Antonio de la Calzada,<sup>698</sup> se había complicado al ocurrir su fallecimiento, pues su principal deudor, el minero Martín de Vértis Vereá,<sup>699</sup> cuya deuda había sido contraída en alguna ciudad del Alto Perú, eludía su cumplimiento respondiendo en 1755 al Barón de Oña Juan José de Yturribálzaga, apoderado de Francisco de las Heras,

"...muy desentonadamente, engreído en que su pariente Don Juan Agustín de Ustáriz, vecino de Cádiz, tiene contenidas a las Herederas [acreedoras] Doña Catalina Patrón y su hermana".<sup>700</sup>

Heras argumentaba que con prioridad a las herederas de Calzada estaban sus acreedores, por lo que encarecía a Nicolás de la Quintana

"...me noticie individualmente el nombre, y vecindario de los dueños de la escritura que vino debiendo Don Antonio, cuyos poderes trajo Don Tomás Alonso Fernández, vecino del Puerto de Santa María".<sup>701</sup>

El caso del General Antonio de Rueda,<sup>702</sup> Corregidor del Pueblo de Santiago de Cotagaita (Provincia de Chichas) y apoderado y socio de Manuel de Escalada Bustillo,<sup>703</sup> es también suficientemente relevante. En 1750 Juan Antonio Bustillo Cevallos,<sup>704</sup> Manuel de Escalada y Antonio de Rueda celebraron una compañía o contrato social por \$300.286, en efectos que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María y José. Una vez introducidos dichos efectos en Buenos Aires,

"...Rueda internó muchos de ellos en el Perú para su venta y beneficio, y condujo una considerable porción a la Provincia de Chichas, en que fue provisto Corregidor a influjo y por interés de la sociedad",<sup>705</sup>

quedando en Buenos Aires Escalada, para recibir las remisiones de plata y dirigirlas a Cádiz. En Cádiz, quedaba Bustillo para poder continuar las negociaciones.

Pero en las cabeceras de provincia, la presencia de comerciantes, peninsulares o porteños, y/o de sus habilitados no siempre era bien recibida.<sup>706</sup> En Potosí, cabecera del enclave minero del Alto Perú, las deudas que el azoguero José de Ascasubi,<sup>707</sup> --dueño del Ingenio Pampa y de la Labor Arenas, uno de los privilegiados del azogue y de la mita-- había contraído con el comerciante porteño Francisco Álvarez Campana,<sup>708</sup> provocaron una profunda como prolongada crisis política, que expresaba la nunca resuelta contradicción entre los intereses mineros y regionales y los intereses puramente

comerciales, y que alcanzó a reflejarse en una compleja actuación judicial.<sup>709</sup> En ella se vieron envueltos los principales funcionarios reales de entonces, incluidos los Oidores de las Reales Audiencias, los Corregidores, los Visitadores Generales y los Jueces Comisionarios enviados por el Virrey de Lima.<sup>710</sup> Rafael de los Reyes y Serrano,<sup>711</sup> apoderado de Álvarez Campana, se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera como Alcalde electo a uno de los testafierros de Ascasubi, el porteño Felipe Santiago de Arce,<sup>712</sup> para que

"...no entendiase en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así como de cajón se mandó librar a mi favor".<sup>713</sup>

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, que operaba como entrepôt alternativo articulado con el enclave minero del Alto Perú, porque "...allí entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".<sup>714</sup> Sin embargo, la gestión habría logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce fue designado Contador Interino de la Real Casa de Moneda de Potosí.<sup>715</sup> Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó a Ascasubi "...todo lo que había en su casa [a lo] que decía era ajeno".<sup>716</sup> Toda esta parafernalia burocrática muestra el poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas, para resistir las presiones de acreedores provenientes de la metrópoli Virreinal y sus correspondientes autoridades, en un período en que Buenos Aires carecía de Consulado propio así como de sus respectivos Diputados. Pero aún posteriormente, cuando Buenos Aires ya contaba con su propio Consulado de Comercio, sus Diputados en Potosí pasaban peripecias propias de Caín. En 1797, el Juez Diputado en Chuquisaca del Consulado de Comercio Manuel Fernández de Alonso,<sup>717</sup> solicitó amparo a la Real Audiencia de Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las autoridades concejiles.<sup>718</sup> La misma actitud excluyente que mantuvo el Cabildo de Chuquisaca con los comerciantes matriculados en el Consulado de Buenos Aires, la sostuvo la Diputación Potosina con los comerciantes matriculados en el Consulado de Chile. En efecto, en 1798 el Juez Diputado en Charcas Fernández de Alonso procesó y ordenó la detención de dos comerciantes matriculados en Chile, Miguel de Elizalde y Fermín Gastelu, quienes se habían negado a solicitar a la Diputación Potosina del Consulado de Buenos Aires permiso para abrir sus casas de comercio en el lugar.<sup>719</sup> Más aún, respecto a los deudores fraudulentos que los Diputados del Consulado solían enviar presos, Tjarks (1962) nos refiere los casos en que el Diputado Matías Texerina y Hurtado denuncia como los presos en el cuartel de milicias eran inmediatamente liberados.<sup>720</sup>

#### **J-VIII Alianzas inter-étnicas.**

Tan odiados eran estos comerciantes provenientes de la sub-metrópolis porteña, que los endeudados azogueros de áreas periféricas como Oruro, perteneciente a la Gobernación-Intendencia de Charcas, que no gozaban del privilegio de la mita o del azogue, no dudaron en aliarse a los indígenas en los primeros momentos de la rebelión encabezada por Túpac Katari. A tal extremo llegó este odio, que los grandes comerciantes y comisionistas peninsulares provenientes de Buenos Aires, como José de Endeyza y Alvear,<sup>721</sup> el Corregidor de Paria Manuel de la Bodega y Llano,<sup>722</sup> y Pedro de Lagrava,<sup>723</sup> en oportunidad de dicha conflagración, ocurrida en 1782, fueron ajusticiados por los indígenas.<sup>724</sup> Apremiados por la presión fiscal que ejercía la burocracia borbónica y por la presión mercantil y financiera que imponían los acreedores peninsulares como Endeyza y Bodega, azogueros tales como el Regidor Decano Manuel Serrano,<sup>725</sup> los Procuradores

Generales Manuel de Aurrecochea,<sup>726</sup> y Clemente José Menacho,<sup>727</sup> y los Alcaldes Domingo Urquieta,<sup>728</sup> Isidro de la Riva,<sup>729</sup> Domingo de Herrera y Galleguillos,<sup>730</sup> Jacinto Rodríguez de Herrera,<sup>731</sup> y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,<sup>732</sup> se solidarizaron con la revuelta, coaligándose con los indígenas.<sup>733</sup> Esta actitud les significó, cuando se produjo la derrota indígena, que sus bienes fueran secuestrados y sus personas fueran remitidas presas a Buenos Aires.<sup>734</sup>

## **J-IX Regiones subsidiarias del Alto Perú.**

El extremo noroeste del actual territorio argentino, constituido por Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja operó como región subsidiaria del Alto Perú. El aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el tercer período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y al Cuadro D-X, fundado en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro D-XI, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.<sup>735</sup> Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.<sup>736</sup>

Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Tucumán, según el Cuadro D-VI, triplicó el número de comerciantes, multiplicó siete veces el número de las operaciones concertadas, y trece veces el monto de las mismas. En el tercer período (1763-82), pese a la profunda retracción registrada en el comercio del Alto Perú, Tucumán duplicó el giro registrado en el segundo período. Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Tucumán, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el tercer período. Según Tjarks (1962), en el último período en la Diputación Tucumana del Consulado de Comercio de Buenos Aires se matricularon 15 individuos, sin discriminar el ramo.<sup>737</sup> Pero, a diferencia de las Diputaciones de las provincias Arribeñas, de los 15 individuos matriculados, casi la mitad se endeudó en Buenos Aires.<sup>738</sup> Salta, que le seguía los pasos a Tucumán, entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) duplicó el número de comerciantes y operaciones y triplicó el monto de estas últimas. En el tercer período (1763-82), Salta cuadruplicó el giro registrado en el segundo período (1748-62). En el quinto y último período (1791-1810) se mantuvo esta cifra registrándose un total de 63 deudores del fiado de Castilla. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de Salta se matricularon 38 mercaderes de efectos de Castilla y 18 mercaderes de mulas, o un total de 56 mercaderes.<sup>739</sup> Pero también, a diferencia de las provincias Arribeñas, y coincidiendo con Mata de López (1994), de los 38 mercaderes residentes en Salta, casi el 70% de los mismos, se había endeudado en Buenos Aires.<sup>740</sup> Asimismo, de la veintena de comerciantes matriculados en Jujuy, nueve de los mismos se habían endeudado en Buenos

Aires.<sup>741</sup> En estas regiones, estos mismos comerciantes buscaban asegurar su posición comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. En Santiago del Estero, una facción compuesta por comerciantes se adueñó del Cabildo por vía venal.<sup>742</sup> En el quinto y último período (1791-1810) se registraron en Santiago del Estero 14 deudores del fiado de Castilla. Y según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Santiagueña del Consulado de Comercio de Buenos Aires, se matricularon 22 comerciantes, sin discriminar el rubro.<sup>743</sup> De ese número, sólo una minoría, el 27%, nunca se había endeudado en Buenos Aires.<sup>744</sup> En Salta, la estrategia adoptada por algunos grandes comerciantes, habilitados por los comerciantes porteños, pero radicados en el lugar, era la de adquirir los cargos concejiles electoralmente y no venalmente.<sup>745</sup> Por último, el noroeste, específicamente Catamarca y La Rioja, en virtud de su desfavorecida ubicación con relación a las rutas mercantiles, registró los guarismos comerciales más bajos. En el quinto y último período (1791-1810) se endeudaron en Buenos Aires sólo 10 comerciantes residentes en Catamarca y 3 en La Rioja. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de Catamarca, se matricularon 25 comerciantes, en el de Ancasti uno y en el de Belén otro, es decir quince comerciantes más de los que se endeudaron en Buenos Aires.<sup>746</sup> Pero de los 25 comerciantes matriculados, la mayor parte, casi un 60%, se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>747</sup>

En los cinco períodos computados en la región, se registraron, según los Apéndices B-III al B-VIII, un total de 511 comerciantes, que se endeudaron en Buenos Aires; de los cuales 201 eran residentes en Tucumán, 148 en Salta, 71 en Santiago del Estero, 50 en Jujuy, 33 en Catamarca, y 9 en La Rioja. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 207 o el 40%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 89 o el 15%, de 2 a 5 años; 103, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 25%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Manuel Vicente Solá con 46 años de actividad, seguido por Gregorio Antonio Zegada con 44 años, y Tomás Rodríguez con 42 años. El parentesco también constituía una valiosa herramienta de continuidad mercantil.<sup>748</sup> En estas regiones subsidiarias del Alto Perú, también se dieron casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Administrador de Tabacos Manuel de Castro insultaba al Diputado del Consulado.<sup>749</sup> Asimismo, en estas regiones se practicaban los llamados repartos de mercancías. En La Rioja, el Administrador de la Renta de Tabacos y Naipes y Capitán de Milicias José Antonio Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios soldados con la venta forzada de bebidas espirituosas.<sup>750</sup> Mercado estaba al frente de las tropas que guarneían la frontera de San Fernando del Río del Valle.<sup>751</sup> En Salta, Julián Gregorio de Zegada,<sup>752</sup> denunciaba la estafa a la que se veían sujetos los milicianos denominados partidarios,<sup>753</sup> a diferencia de los llamados ordenanzas,<sup>754</sup> pues el pago de sus sueldos se demoraban tanto en llegar que los milicianos al no tener

"...con que aperse de cabalgaduras, y demás cosas que deben tener para el desempeño de su ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian recibiendo al fiado en ocho lo que no vale dos por la poca esperanza, que tiene el que las fía de recoger su dinero".<sup>755</sup>

Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les obliga a recibir cuatro pesos en jéneros si quieren ver uno en dinero".<sup>756</sup>

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la región.<sup>757</sup>

#### **J-X El mercado del reino de Chile.**

La región que le siguió al Alto Perú, en importancia estadística, en cuanto al volumen comercial, fue el reino de Chile. Contrariamente a lo expresado por Villalobos (1968, 1990), los comerciantes de Chile poseían válvula de escape hacia otras regiones, donde le disputaban los mercados a los comerciantes Limeños, tales como Arica, Arequipa y Moquegua.<sup>758</sup> Entre el primer período (1713-1748) y el segundo período (1748-62), según el Cuadro D-VI, Chile duplicó el número de comerciantes, casi triplicó el número de operaciones, y dobló en exceso el monto total de las operaciones. En el tercer período (1763-82) experimentó una tremenda retracción, aunque no tan acentuada como la experimentada por el Alto Perú, habiéndose reducido a la tercera parte de lo girado en el primer período. Pero lo atípico de esta región se registró en el cuarto período (1783-90) y en el quinto período (1791-1810), cuando a diferencia del Alto Perú, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, retrajo el mismo a la mitad del registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse producido por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos.<sup>759</sup> Otra eventualidad, es que en estos dos últimos períodos la mayor parte de los comerciantes Chilenos no se endeudaran con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hicieran con comerciantes Cuyanos. Sin embargo, Villalobos (1968) confirma estas cifras, al denunciar que de una lista confeccionada en 1806 de 81 comerciantes solamente 43 tenían capital en giro.<sup>760</sup> La Lista A-XIII trae la nómina de las autoridades del Consulado de Comercio de Santiago de Chile. En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-XIII, un total de 332 comerciantes residentes en Chile, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 183 o el 55%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 83 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 49, o el 14%, de 6 a 20 años; y el 6%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Bartolomé Montaner con 40 años de actividad, seguido por Tomás Antonio de Vicuña,<sup>761</sup> con 34 años, y Matías Grimau con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>762</sup>

#### **J-XI El mercado Cuyano.**

La región intermedia entre Buenos Aires y Chile fue Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis). Entre el primer y segundo período Cuyo duplicó el monto total de las operaciones. Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de Sobremonte y el Pbro. Domingo García,<sup>763</sup> al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae el Cuadro D-X, fundado en los datos proporcionados por Larrouy (1927), para las provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una aproximación numérica, en la proporción de población patricia respecto de la población mercantil forastera.<sup>764</sup> En el tercer período (1763-82) Cuyo experimentó una retracción, aunque no tan acentuada como la experimentada por Chile, habiéndose reducido a la mitad de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90) y en el quinto período (1791-1810), al igual que en el Tucumán y Chile, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, Cuyo retrajo el mismo a la mitad del registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse producido también por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos, que le habría restado volumen al tráfico trasandino.<sup>765</sup> En el quinto y último período (1791-1810) se endeudaron

en Buenos Aires sólo 27 comerciantes residentes en Mendoza. Según Comadrán Ruiz (1984), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Mendocina del Consulado de Comercio de Buenos Aires, actuaron 38 comerciantes, es decir once comerciantes más de los que se endeudaron en Buenos Aires.<sup>766</sup> La Lista A-XI trae la nómina de los Diputados Mendocinos. Y según la Lista A-XII, formulada por los Alcaldes Tadeo Cano de Carbajal y Mateo Cano y Ramírez, entre 1808 y 1810, los candidatos a Diputados Sanjuaninos del Consulado de Buenos Aires alcanzaron a una docena de comerciantes, entre los cuales figuraban un par de parientes.<sup>767</sup> En los cinco períodos se registraron, según los Apéndices B-X al B-XII, un total de 321 comerciantes residentes en Cuyo que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 175 o el 54%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 70 o la quinta parte, de 2 a 5 años; 58, o el 18%, de 6 a 20 años; y el 4%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Juan Gregorio Molina con 33 años de actividad, seguido por Pedro Gamboa con 30 años, y Félix Correas con 30 años. Otros comerciantes se perpetuaban siguiendo la vía del parentesco.<sup>768</sup> También en esta región subsidiaria del Reino de Chile, se practicaban los llamados repartos de mercancías. Al igual que en las regiones mineras de Chile, en Mendoza, el Teniente Corregidor de Lagunas y Corocorto Manuel Martínez Caballero, extorsionaba en 1782 a los Pueblos de Indios de Asunción y San Miguel con cargas de vino y aguardiente,<sup>769</sup> y en San Juan, el Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro de Real Hacienda Juan Manuel de Castro Carreño,<sup>770</sup> era denunciado en 1793 por su pariente el Comandante de Milicias José Xavier Jofré por el

"...delincuente proceder de vender públicamente por su cuenta los azogues del Rey al precio de 12 reales cada libra y 2 pesos a Mineros pobres de aquellas jurisdicciones, [y] a los excesivos valores en que expendía los Sumarios de Bulas e indultos".<sup>771</sup>

Procedimientos coactivos semejantes a los anteriormente relatados, mediante las llamadas tiendas volantes y las denominadas pulperías de campaña, eran practicados por los Alcaldes de Hermandad y los Comandantes de Armas en las campañas Rioplatenses, Cordobesas y Cuyanas.<sup>772</sup> Garavaglia (1983), Gelman (1985), Moutoukias (1988), Saguier (1989), Birocco (1993) y Pérez (1993) hallaron que los funcionarios civiles y militares practicaban el reparto de mercancías entre las propias milicias, los pueblos de indios de Paraguay, Corrientes y Buenos Aires, las peonadas de las estancias de Buenos Aires y las tropas de las vaquerías de la Banda Oriental, respectivamente.

## **J-XII El mercado cordobés.**

El tercer mercado en importancia, según el Cuadro D-VI, fue Córdoba, verdadero nudo de todas las rutas comerciales del interior. En el Cuadro D-XI, Córdoba figura tercera, con el 13%, en el ranking de posiciones de aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, siguiendo a Santiago del Estero que contó con el 25,8%, y a Tucumán que contó con el 23,4%, y precediendo a Salta que contó con el 12%.<sup>773</sup> Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Córdoba triplicó el número de comerciantes, y multiplicó seis veces el número y monto de las operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82) Córdoba, a diferencia del Alto Perú y de Chile, prolonga en exceso el auge del segundo período (1748-62), aunque en ello es superada ampliamente por Tucumán. A juzgar por Punta (1992), Córdoba pudo sortear

la retracción de la demanda Altoperuana merced a sus ya desarrollados vínculos con otras regiones del espacio colonial. Paradigma de esta estrategia de supervivencia fueron las actividades del comerciante Juan Bautista Carvallo, quien importaba ropa de la tierra desde Chile, y aguardiente desde San Juan y La Rioja, e introducía yerba desde el Litoral.<sup>774</sup> Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Córdoba, a semejanza de Chile y Tucumán, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el tercer período (1763-82), endeudándose sólo un total de 47 comerciantes. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Cordobesa del Consulado de Comercio, se matricularon 53 comerciantes de efectos de Castilla, 14 de efectos del campo, 26 de mulas al por mayor, y 38 los "...que han abierto tiendas de abasto o pulperías".<sup>775</sup> De los 53 individuos matriculados como comerciantes de efectos de Castilla, sólo una minoría de 15 comerciantes nunca se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>776</sup> Como en Salta y Tucumán, en Córdoba, estos comerciantes buscaban asegurar su posición comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. Francisco Antonio Díaz,<sup>777</sup> y Bernabé Gregorio de Las Heras,<sup>778</sup> quienes contaban con un intenso giro comercial que se extendía desde Buenos Aires hasta Salta, extremos por donde viajaban asiduamente, lograron ser designados Alcaldes de Primero y Segundo Voto, respectivamente.<sup>779</sup> En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-IV, un total de 304 comerciantes residentes en Córdoba que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 127 o el 40%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 77 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 80, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 9%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Juan Francisco de la Bárcena con 42 años de actividad, seguido por José Martínez con 39 años, y Pedro García Posse con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>780</sup> En esta provincia, también subsidiaria del Alto Perú, se dieron asimismo casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Diputado Francisco Antonio Bulnes fue humillado por el Cabildo por no haber aceptado su condición de Juez Real.<sup>781</sup>

### **J-XIII El mercado litoraleño.**

El Litoral, compuesto por Paraguay, Santa Fé, Corrientes y la Banda Oriental registró, según el mismo Cuadro D-VI, el cuarto lugar en importancia. Lamentablemente, las cifras de población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae el Cuadro D-X para las provincias del norte, no nos permite tampoco en este caso inducir una aproximación cuantitativa al monto de la población patricia ni al de la población mercantil forastera. Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Paraguay triplicó el número de las operaciones concertadas, y multiplicó cuatro veces el monto de las mismas. En el tercer período (1763-82), Paraguay, a semejanza del Alto Perú y de Chile --aunque a una intensidad mucho menos acentuada-- disminuyó su giro a la mitad. Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Paraguay, redujo su giro a la tercera parte de lo registrado en el tercer período. Muy probablemente, en estos dos últimos períodos, la mayor parte de los comerciantes Paraguayos no se endeudaron con comerciantes porteños, sino que lo hicieron con comerciantes Correntinos y Santafesinos. En los cinco períodos se registraron en la región, según los Apéndices B-XVII al B-XXI, un total de 663 comerciantes que se endeudaron en Buenos Aires, 303 residentes en el Paraguay, 138 en Santa Fé, 123 en Corrientes y 99 en la Banda Oriental. En esta región, también se dieron casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Juez de Comercio de la Villa Real de

Concepción Francisco de Quevedo no fue respetado en la magistratura que investía por el Subdelegado José Espínola.<sup>782</sup>

En la región litoraleña, Santa Fé ocupaba un lugar clave. Según Tjarks (1962), en géneros de Castilla traficaban de 6 a 8 mercaderes y en efectos de la Tierra de 10 a 12 mercaderes.<sup>783</sup> La Lista A-XIV trae la nómina de los Diputados Santafesinos del Consulado de Buenos Aires. En Montevideo, según Falcao Espalter (1926), existían 250 casas comerciales, tiendas y pulperías, y en el interior de la Banda Oriental 151 comercios.<sup>784</sup> En este sentido, Tjarks (1962) tuvo que discrepar con Pivel Devoto (1952), respecto a la veracidad del Informe que en 1803 elevara el Virrey del Pino.<sup>785</sup> En todo el Litoral, según el Cuadro D-VII, 406 o el 61% alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 101 o el 15%, de 2 a 5 años; 134, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 4%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Antonio Sánchez con 51 años de actividad, seguido por Policarpo Aguirre con 35 años, y por José Francisco Tarragona con 34 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>786</sup>

También en Paraguay se registró el reparto forzoso hasta fechas muy tardías. En 1797, el Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real".<sup>787</sup> El objeto de este último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,<sup>788</sup> era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita".<sup>789</sup> En cuanto a la naturaleza de estos Repartos, según una Noticia de los indios del Chaco y del Paraguay, el Administrador General de las Misiones "...jamás envía lo que se les pide y necesita el pueblo".<sup>790</sup>

La relación entre comerciantes mayoristas y minoristas también seguía un curso teñido por la naturaleza compulsiva del comercio colonial. Mientras los comerciantes mayoristas porteños sostenían que la mera habilitación no podía ser equiparada a una compañía o sociedad, los minoristas del comercio Paraguayo alegaban que la participación en las utilidades como consecuencia de una habilitación, les confería derecho a retener el principal (capital) y ser tenidos por socios o compañeros. Pero un mayorista dueño de tienda preferirá un habilitado a un compañero. En el conflicto que se suscitó en 1788 con motivo de la rendición de cuentas exigida a Félix David,<sup>791</sup> comerciante en el Paraguay, por Pedro García Rodríguez, el primero exclamaba desde Asunción

"...!Rara solicitud! ¿acreditó acaso, el trato de compañía que supone? ¿justifica haberme hecho alguna habilitación para ello? ¿documenta algún pacto escrito, o de algún modo estipulado, que pronostique tal compañía? ¿hay en autos acto alguno positivo que arguya compañía entrambos fuera de la pulpería? nada menos: luego es preciso confesar que es un delirio contemplarse socio, en aquellos negocios y es una maliciosa y punible temeridad, quererme pedir cuentas quien debe estudiar y afanarse por dárme las como está obligado de uno y otro manejo".<sup>792</sup>

En un litigio entre un comerciante minorista Luis Cecilio Collantes,<sup>793</sup> que traficaba con Cuyo, y un mayorista Juan Carlos Wright,<sup>794</sup> este último alegaba que un contrato que interese al habilitado en las ganancias de lo que produjese un capital, como se hace con cualquier dependiente, a quien se pretende fomentar atendido su trabajo, y su buen

procedimiento; no puede llamarse Contrato de Sociedad o Compañía porque para que lo haya entre dos o más personas,

"...se requieren por las Leyes otras circunstancias que no se encuentran en la habilitación siendo la más principal la designación del término o plazo; porque no hay alguna sin tiempo determinado".<sup>795</sup>

Supuesto pues que la negociación de los intereses que puso Wright en manos de Collantes, no ha sido jamás ni podido llamarse Compañía, sino una habilitación, Wright se preguntaba

"...¿habrá quien diga que no tengo acción para pedirle mi principal [capital] cuando me parezca conveniente, para obligarle a que me de cuenta y razón de estos intereses; mucho más teniendo poderosos fundamentos para persuadirme y convencerme de su mala versación?".<sup>796</sup>

Fundado en que leyes, se preguntaba también Wright, pretende Collantes

"...impedirme el libre uso de mis intereses, ¿no teniendo otra representación que la de un habilitado y favorecido? Por esta regla debían todos los dependientes entablar pleito con su habilitador, siempre que éste por justos motivos quisiese disponer de sus intereses. De modo que después de haberse manejado en estos términos,...no pueda separarme de esta habilitación a la que ha querido darle el nombre de compañía sólo porque suela tener derecho a las utilidades, cuando no hay habilitación que se haga, de cualquiera dependiente, en que no se le interese en ellas, sin que por esto se diga que el Patrón o Habilitador hace compañía con el Dependiente a quien protege".<sup>797</sup>

Dentro de las provincias litoraleñas, a juzgar por el Cuadro D-VI, Corrientes igualó entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) el número y monto de las operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82), Corrientes duplicó su giro. Esta duplicación del giro comercial, en un período cuando las demás regiones registran una profunda retracción, obedeció a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía del litoral se entró a dinamizar con la exportación de cueros. Corrientes contaba para 1751 con 440 familias, para 1753 con 300 vecinos, para 1760 con 1.440 milicianos, y para 1769 con 1.021 milicianos.<sup>798</sup> Los linajes patricios comenzaron a enfrentarse entre sí por el derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el circuito de la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones y con la comercialización de la yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal motivo por el cual a la facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-élite con fuertes elementos anti-jesuiticos. Durante el cuarto período (1783-91), Corrientes, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el segundo período (1748-62), y en el quinto período (1791-1810) repuntó igualando al tercer período (1763-82). Y en el quinto período (1791-1810), Tjarks (1962) registró en Corrientes solo una decena de comerciantes. Y según Maeder (1981), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Correntina del Consulado de Comercio de Buenos Aires, se matricularon 62 comerciantes de efectos de Castilla y de la tierra. De estos 62 mercaderes, sólo una decena se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>799</sup> Muy probablemente, en los dos últimos períodos, la mayor parte de los comerciantes Correntinos se endeudaron con comerciantes Santafesinos. En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-XX, un total de 123 comerciantes residentes en Corrientes que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 68

o algo más de la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 20 o el 16%, de 2 a 5 años; 34, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 8%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Gregorio Tomás Sáinz de Cavia con 44 años de actividad, seguido por Francisco Ximénez con 27 años, y Sebastián de Casajús con 25 años.

#### **J-XIV El caso de los viáticos.**

En aquellas regiones, donde el comerciante debía internarse con sus propias mercaderías, sin contar con habilitación alguna, debía afrontar los viáticos con sus propios ingresos. Por viáticos se entendía los gastos de vivienda, comida, vestuario, calzado, lavado, planchado, peluquería y barbería. Por cierto estos gastos eran más altos en la carrera altoperuana que en la del litoral. En el caso del comercio paraguayo, con ser mucho más económico que el del Alto Perú, los gastos alcanzaban, a juzgar por la correspondencia del comerciante Félix David, de paso por Asunción en 1788 con su compañero Pedro García Rodríguez, la suma de 13 a 14 pesos mensuales.<sup>800</sup> David le expresaba con alguna interesada exageración a García Rodríguez que la demora en ser surtido con nuevos renglones de mercaderías era la causa de que no hubiera ganancias, y que en tanto eran irremediables los gastos, pues

"...para una comida que es la que hago al día gasto \$6, \$3 de la casa, \$2 de lavar la ropa, 8 reales de velas, y 2 reales de agua sin el pan, que nunca lo como, sólo con maíz y mandioca, cuando la ai, y con todo no se puede dexar de gastar de 13 a 14 pesos todos los meses, y el negocio no lo dexa..."<sup>801</sup>

#### **J-XV El mercado de la Banda oriental.**

El quinto y último lugar en el score le correspondió a la Banda Oriental. Lo atípico de esta región se registró en el segundo y tercer períodos, cuando a diferencia de las otras regiones, redujo y repuntó su giro respectivamente. En el segundo período (1748-62) redujo el giro a la quinta parte de lo registrado en el primer período (1713-48), y en el tercer período (1763-82) multiplicó su giro en forma inverosímil. Este boom obedeció a la acentuada demanda Europea de cueros. En los cinco períodos se registraron un total de 99 comerciantes residentes en la Banda Oriental, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 70 o el 70%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 7 o el 7%, de 2 a 5 años; 21, o el 21%, de 6 a 20 años; y el 2%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habrían llevado José Durán y Tomás Fernández con 22 años de actividad cada uno, seguidos por Luis Miralles y Juan Porcel de Peralta con 17 años cada uno, y Bartolomé Cuenca y Manuel Correa Morales con 16 años cada uno.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas listas, cuadros y apéndices aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, había logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes

no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

## Capítulo I-C-11

### **Fluctuaciones cíclicas del mercado de mercancías y rol del crédito mercantil (siglo XVIII).**

#### Índice

- K-I Tradición historiográfica en materia de circulación comercial
- K-II Medios de pago escriturarios
- K-III Períodos de paz.
- K-IV Balanzas comerciales.
- K-V Etapas comerciales marcadas por los ciclos de expansión y depresión.
- K-VI Comercio de los Navíos de Registro.
- K-VII Comportamiento de las cesiones de crédito.
- K-VIII Guerras de Coalición contra la Francia Revolucionaria.

#### **K-I Tradición historiográfica en materia de circulación comercial**

La abrumadora presencia de capital comercial y de comerciantes peninsulares en el Buenos Aires dieciochesco, sumado a las crónicas crisis comerciales, acentuó el proceso de diferenciación social, desestabilizó la sociedad colonial, multiplicó la demanda de crédito, y condicionó el desarrollo de una vía mercantil de extracción del excedente (operaciones crediticias) en perjuicio de las vías eclesiásticas y fiscales. Por el contrario, la escasez de capital comercial y de comerciantes en el Nordeste y el Noroeste del antiguo Virreinato del Río de la Plata congeló la estructura de la sociedad colonial y determinó que el peso de la extracción del excedente económico recayera en las vías eclesiásticas y fiscales, en perjuicio de las vías mercantiles de extracción del excedente.

Si tomamos el plano de la circulación (comercio) como corte central de las crisis económicas, tal como lo pretendió Levene (1952) para el Río de la Plata del siglo XVIII y Prado Junior (1961) para el Brasil de igual siglo, las depresiones que seguían a las euforias económicas o procesos inflacionarios de mediados del siglo XVIII habrían sido consecuencia del incremento y caída del comercio exterior.<sup>802</sup> Pero las crisis cíclicas no eran producto de la escasez de metálico como lo sugiriera Hamilton (1934), o a la caída demográfica tal como lo sugirieron Borah (1949) y Chaunu (1963), o a la creciente auto-suficiencia de las colonias, como lo sostuvo Lynch (1969), o a la baja tendencial de la tasa de ganancia --que habría resultado del aumento de la composición orgánica del capital minero-- porque simplemente el capital minero apenas si había modificado su composición orgánica.<sup>803</sup> Siguiendo la Teoría Cuantitativa del Dinero y fundados en Hamilton (1934), autores como Mauro (1964), Chaunu (1969) y Carmagnani (1975) sostuvieron que las crisis comerciales en las colonias carecerían de motivaciones propias referidas a la

geología del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y serían más bien producto de la caída de la demanda Europea de metálico.

En su lugar, Bernal (1992) sugiere fundado en las fuentes estadísticas que brinda Schumpeter (1960), y en las obras de Dermigny (1964), Vilar (1969), Boxer (1969), y Brading y Cross (1972) que dichas crisis fueron producto de los desequilibrios de la paridad oro-plata y de la caída relativa de la demanda Inglesa de metal plata en favor del oro brasileño.<sup>804</sup> Como bien lo señala Bernal (1992), Chaunu probó sus hipótesis preocupándose por el ritmo del tráfico, y el nombre de los barcos y de los maestros; y García Baquero (1977), para justificar su seguimiento de la metodología de Chaunu, subrayó la imposibilidad física de cuantificar las escrituras de riesgo marítimo.<sup>805</sup> En el análisis de las discrepancias (déficits y superávits) del comercio exterior, Bakewell (1976) se preguntaba para el caso de la Nueva España del siglo XVII ¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?. Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz.<sup>806</sup>

Pero en Europa, para Spooner (1972), Meuvret (1974), Van der Wee (1977) y Miskimin (1975, 1979), el crédito es el que vino a sustituir a la moneda metálica en momentos de crisis. Y en América Latina, Mellafé (1959), Brading (1975), Morin (1979), Greenow (1980), Super (1983), Borchart de Moreno (1984), Müller (1987) y Pérez Herrero (1988) sostuvieron, a diferencia de Romano (1966), que en el pasado colonial rigió una intensa reciprocidad crediticia que aceleraba la rotación del circulante, reflejada en las cartas de poder en causa propia, el fiado o crédito de venta, las libranzas y las cesiones de crédito.<sup>807</sup> Y en el Río de la Plata, L. Johnson (1990, 1992) y Saguier (1991), también en contraste con Romano (1963), sostuvieron que en la segunda mitad del siglo XVIII se experimentó en los precios de las mercancías, los frutos de la tierra, los salarios y los alquileres, una tendencia ascendente en el largo plazo. Pero como esta tendencia no se explica sólo por el incremento demográfico (variable T en la fórmula de Fisher) y la recuperación minera (variable M de dicha fórmula), experimentada a mediados del siglo XVIII, fue preciso recurrir a otros factores, algunos de ellos presentes en la velocidad de circulación de la moneda (variable V de dicha fórmula).<sup>808</sup> En efecto, Goldstone (1984) sostuvo que los elementos claves del problema suscitado entre la población y la oferta monetaria eran las proporciones que resultaban de dividir la velocidad de circulación del dinero (V) por el volumen de bienes comercializados (T), y no la proporción entre la oferta de moneda (M) y el nivel general de precios (P).<sup>809</sup> De no haber estado acompañada la inflación de precios por un proceso de proto-industrialización y por un incremento en la circulación del stock de moneda, la inflación en Nueva España --a juicio de Ouweneel y Bijleveld (1989)-- no se habría producido.<sup>810</sup>

A juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986), las crisis inflacionarias y deflacionarias del mundo colonial habrían sido provocadas tanto por los momentos de paz que causaban desequilibrios negativos como por las guerras Europeas que generaban

desequilibrios positivos en la balanza comercial.<sup>811</sup> En el Río de la Plata, las crisis cíclicas habrían sido --a diferencia de las tesis de Romano (1963) y H. Johnson (1973) que sostienen la escasez crónica de dinero en circulación y la existencia de una "economía natural"-- producto de una perturbación de la circulación del capital comercial, provocada por una insuficiencia de importaciones en relación con una abundancia de metálico por un lado, o producto de un exceso de importaciones en relación con un vaciamiento de metálico por el otro. Es decir, las crisis serían producto de un des-balance entre la demanda y la oferta de artículos de importación y de exportación (plata, oro, cueros, sebo, tasajo, yerba, lana, etc.). Pero mientras mediante el crédito de venta o fiado las mercancías importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía, mediante los instrumentos del censo y las obligaciones a réditos (crédito de compra) la moneda-circulación se enfrentaba a los frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), a la adquisición de inmuebles urbanos y rurales y mano de obra esclava, y a la industria de la construcción. Por ello es que Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990), y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fue no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.<sup>812</sup>

Las euforias o procesos inflacionarios habrían difundido esperanzadas expectativas de prosperidad, las que al no cumplirse, como consecuencia de las depresiones provocadas por las guerras europeas y/o la saturación de los mercados, habrían generado una profunda frustración, fuente principal de un creciente descontento. A su vez, estas depresiones económicas habrían provocado, según Assadourian (1970), una desarticulación radical del comercio colonial en general, elevando y/o hundiendo la función de diversas ciudades como mercados redistribuidores de las importaciones y las exportaciones, sin que por ello se alcanzase a alterar los modos de producción existentes.<sup>813</sup>

## **K-II Medios de pago escriturarios**

Precisamente, por su naturaleza de circulante transitorio, el crédito mercantil o los medios de pago escriturarios vinieron, al menos en la esfera del comercio mayorista o de larga distancia, a sustituir o desplazar la moneda metálica. Asimismo, la plata, los cueros, los ponchos, el lienzo de algodón, la yerba y las sacas de lana de vicuña, cobrados a los comerciantes del interior, que habían comprado mercancías a crédito en Buenos Aires, era remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así el dinero metálico y los llamados frutos del país como base financiera de una pirámide constituida por préstamos y créditos, instrumentados mediante cesiones de crédito, letras, libranzas, asientos contables, vales y obligaciones endosables. Estos instrumentos implicaban un mecanismo multiplicador que convertía los medios de pago emitidos por firmas privadas en un múltiplo de la moneda metálica, soberana y monopolísticamente emitida por el monarca absoluto.<sup>814</sup> Para expandir el volumen total de medios de pago actuaba sobre la base metálica un multiplicador de crédito. Por ello, la masa de medios de pago en circulación debió de ser en tiempos coloniales muy superior a la que resultaría de computar solamente la circulación de monedas de oro y plata. Y si consideramos la emisión por parte de los comerciantes de vales privados o extra-notariales también la masa de medios de pago en circulación habría sido en tiempos coloniales muy superior a la que resultaría de computar solo la circulación de obligaciones notariales. Al continuar las inyecciones de medios de pago metálico y crediticio, notarial y extra-notarial,

los comerciantes comenzaron a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de rotación del circulante. Estas operaciones de descuento, hechas a una determinada tasa de interés, deben haber alentado las importaciones de mercancías Europeas y de esclavos Africanos, la producción minera, la recolección de frutos (cueros y yerba) y la consiguiente salida al exterior de metal y de frutos de la tierra (cueros), así como afectado el monto de los capitales descontados en dichas cesiones de deudas. Los medios de pago no metálicos emitidos por particulares deben haber sustituido, en gran medida, al oro y plata en circulación.

En períodos de crisis comercial, la brecha social se acentuaba, los comerciantes locales y los terratenientes se aliaron en un frente común, bajo la hegemonía de estos últimos, contra los representantes del monopolio español desatelizando sus "hinterlands" y sentando nuevos patrones de comportamiento económico, demográfico y social. La relajación de los mecanismos de dependencia permitiría acaso un más descentralizado sistema de crédito, una mayor concurrencia de mercancías en el mercado interno; una acentuada dependencia de la oferta de mercancías peruanas y chilenas; un crecimiento temporario de la manufactura local (carnes saladas, suelas, velas, etc.); un acentuado proceso de mercantilización de la tierra y la fuerza de trabajo; un creciente proceso de mestización, y un intenso proceso de desestamentalización de la sociedad colonial.

Históricamente, las crisis comerciales se saldaron siempre, ya sea ampliando los mercados externos mediante la conquista o la guerra, o mediante políticas mercantilistas, proteccionistas o librecambistas (comercio con colonias extranjeras o en buques neutrales); o ampliando la demanda interna mediante violentas redistribuciones del ingreso (confiscaciones eclesiásticas, desamortizaciones, reformas comerciales, etc.). Como era de esperar, Buenos Aires y su área de influencia no podían estar ajenos al impacto de dichas políticas anti-cíclicas. Durante el ejercicio de dichas políticas es que Buenos Aires comienza a engendrar una burguesía comercial local.

### **K-III Los períodos de paz.**

La paz, con la tremenda afluencia de mercaderías importadas procedentes de África y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor movilidad social del personal dependiente del comercio (mozos de tienda), la estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. Dado que los precios de las mercancías importadas caían aún en forma más fuerte con relación a los precios de la tierra urbana y rural y de los bienes inmuebles, éstos últimos servían de garantía para la adquisición de las primeras. De tal modo caían los precios de los bienes importados que el premio de la moneda doble, los salarios y jornales rurales, y la renta de la tierra también se elevaban. No obstante, la diferencia de precios entre regiones dispares seguía siendo una fuente de ganancias siderales. El efecto habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos, creando una inflación de ganancias que favoreció a la clase mercantil a expensas de los encomenderos,

los propietarios de tierras y los detentadores de ingresos fijos. Agréguese que, los tiempos de paz indujeron a la corona a recuperar los oficios públicos de manos de los criollos, para favorecer fundamentalmente a aquellos originarios de España.

Cuando la paz era alcanzada entre ambas potencias metropolitanas el comercio monopolista era reanudado y se practicaban mutuas concesiones económicas, la Colonia del Sacramento era devuelta a los Portugueses, el Río de la Plata retornaba a su status de colonia semi-periférica, reforzada con la presencia de minorías comisionistas, intermediarias o consignatarias; la vigencia de una burguesía comercial autónoma quedaba frustrada con la consecuente multiplicación de los concursos de acreedores y las liquidaciones de cuentas, la movilidad social de la población empleada en el comercio mayorista y minorista acentuada, el precio de los arrendamientos urbanos y rurales en alza con la consiguiente reactivación de la construcción urbana, y la autonomía relativa de la burocracia política colonial disminuida. En efecto, en períodos de paz o tregua (precios bajos) los premios por la moneda doble habrían sido altos, los valores de la tierra y de la mano de obra esclava serían relativamente bajos, así como la tasa de interés de la moneda corriente o sencilla, con probable efecto estimulante sobre la compra de tierras y esclavos o el alquiler de mano de obra indígena y esclava. Si bien es cierto que las guerras exitosas o los tratados de paz exitosos alcanzan a extender los mercados coloniales de mercancías más allá de las fronteras originales (tal es el caso de los Portugueses a través de la Colonia del Sacramento), también lo es que las burguesías comerciales locales no alcanzan en esa misma época a extender su hegemonía sobre un mercado interno de tierras y mano de obra más allá de sus propios límites provinciales. Sin embargo, la emergente burguesía comercial Rioplatense habría logrado articular mercados consumidores geográficamente dispersos y económicamente distintos que, a su vez, le permitirían compensar los altibajos de las crisis comerciales cíclicas reacomodando los elementos que componían el viejo mercado interno colonial.

En principio, entonces, entre la gama de fenómenos históricos a discutir debemos mencionar la balanza comercial, la relación entre el crecimiento de la población y la oferta de moneda, la estructura (cantidad, dimensión y permanencia) y comportamiento de los mercados de mercancías y de bienes de inversión o de renta (casas, esclavos, chacras y estancias), el proceso de urbanización y el tipo y naturaleza de las redes de intercambio. Y entre la gama de problemas históricos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo entre los déficits y superávits de la balanza comercial y la insuficiencia o exceso de importaciones; entre el incremento de la población de mercaderes y el tamaño de sus capitales y tiendas, la dimensión de sus transacciones, y la permanencia física y/o generacional en el giro; entre la intensidad del proceso de urbanización y la densidad del mercado inmobiliario urbano; entre el tamaño y la especialización de chacras y estancias y su participación en los mercados abastecedores; entre la velocidad de circulación del dinero y la naturaleza de las redes de intercambio; y entre las dificultades para exportar mercancía-dinero y el aumento de los capitales puestos a censo. Resolver estos problemas históricos implica investigar un intrincado tejido documental.

A los efectos de realizar este estudio fue preciso analizar las importaciones de géneros españoles y libres, las remesas de plata a España, el comportamiento de los mercados de mercancías y del dinero escriturario, del crédito hipotecario y de los mercados de bienes de inversión o de renta.<sup>815</sup> Para ello fue necesario relevar una inmensa masa de datos de los libros de Contaduría de la Caja de Buenos Aires, de los protocolos notariales de Buenos Aires y de los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Dicho relevamiento

consistió básicamente en las escrituras de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España; en las infinitas escrituras de fiado de Castilla que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial; en las numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor; en las cancelaciones de las escrituras de fiado que los deudores o sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares o crédito de compra; en las compraventas de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales; en las escrituras de declaratorias por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos; y en los asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Para ello tuvimos que ordenar miles de escrituras y asientos por la fecha de la transacción registrada.

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en el comercio exterior e interior. En principio, postulamos la hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación positiva o correlación directa entre las cinco variables principales del capital mercantil: las arribadas de los navíos de la Real Compañía de Guinea y del Real Asiento de Inglaterra (RAI) y de los llamados navíos de registro (Francisco de Alzaybar, Pedro de Lea, Manuel de Olivera Braga), el fiado registrado en Cádiz, el fiado registrado en Buenos Aires, la cancelación y la cesión de créditos, las importaciones y las remesas de metal y frutos de la tierra a España para adquirir mercancías al contado o cancelar deudas contraídas al adquirir mercancías a crédito; y de una co-variación negativa entre el fiado de Castilla por un lado y las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y estancias) por el otro. El estudio del alza o baja de los precios de los productos en el Río de la Plata debería comenzar por el de las mercancías importadas, porque sólo ellas se enfrentaban al metal como mercancía y no como medio de circulación. Ellas habrán de ser analizadas a través de la información brindada por el crédito de venta, las cancelaciones, las cesiones y las remesas de plata a España.

#### **K-IV Las balanzas comerciales.**

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción dio lugar a lo que se dio en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superávits o déficits. La Tabla A-I ilustra los altibajos de la Balanza Comercial entre 1778 y 1796. El Gráfico A-I, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de mercancías (CM) entre 1697 y 1810, el cual totaliza unas 20.000 escrituras de fiado. El Gráfico A-II, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de cesiones de crédito (CC) entre 1749 y 1799, el cual totaliza un millar de cesiones de crédito. El Gráfico A-III, fundado en la Tabla A-III, ilustra las fluctuaciones de los gravámenes eclesiásticos (CH) entre 1707 y 1818, el cual totaliza unas 700 escrituras de capellanías. Los Gráficos A-IV al A-VI, fundado en la Tabla A-IV, ilustran las fluctuaciones del crédito hipotecario (CH) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 572 obligaciones a censo, unas 755 imposiciones a censo, y 1.528 obligaciones a réditos pupilares. El Gráfico A-VII, fundados en la Tabla A-V, ilustran las fluctuaciones del mercado de mano de obra esclava (MMOE) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 16.318 compraventas y unas 1.932 manumisiones. El Gráfico A-VIII, fundado en la Tabla A-VI, ilustra las fluctuaciones del mercado inmobiliario urbano (MIU) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 12.831

escrituras. El Gráfico A-IX, fundado en la Tabla A-VII, ilustra las fluctuaciones del mercado inmobiliario rural (MIR) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 1851 escrituras.

### **K-V Etapas comerciales marcadas por los ciclos de expansión y depresión.**

La importación de géneros españoles, extranjeros y libres, pasó por diversas etapas marcadas por los ciclos de expansión y depresión, provocados por los desequilibrios de la balanza comercial. En su primer etapa rigieron los acuerdos o asientos. Con la Paz de Ryswick (1697), en el bienio 1697/98, el crédito mercantil notarial (CM) creció de 63 operaciones por valor de \$87.459, a un promedio del orden de los \$43.000 anuales, a 377 operaciones por valor de \$1.756.000 en el quinquenio 1699/03, a razón de \$350.000 anuales. Algunos años después, la arribada de los barcos negreros de la Real Compañía de Guinea provocaron el crecimiento del crédito mercantil de 27 operaciones por \$42.000 en 1707 a 51 operaciones por \$132.000 en 1708, prolongándose hasta 1713. Jorge Hays, director de la Real Compañía de Guinea, alcanza a practicar entre 1705 y 1719 más de medio centenar de operaciones de crédito por valor de \$471.621. Más no sólo la Compañía de Guinea lucró con este negocio, sino también otros comerciantes como el Cap. Joseph de Ibarra Lascano, con 23 operaciones por valor de \$232.141, y Domingo de Ormazábal con 5 operaciones por valor de \$154.915.

Con las guerras, el crédito mercantil declinaba y el riesgo de mar crecía. El Gráfico A-I y la Tabla A-II demuestran como durante la Guerra de Sucesión de España (1708-13) el crédito mercantil declinó en un 88% y el riesgo de mar creció en un 90% para las Islas del Caribe, y en un 100% para el comercio del Pacífico.<sup>816</sup> El resultado de la Paz de Utrecht (1715), provocó la entrega de la aduana porteña al Real Asiento de Inglaterra (RAI). Cada vez que esta Compañía arribaba con sus barcos negreros a Buenos Aires el crédito mercantil sufrió sendos impactos positivos. Ello ocurrió en 1715, 1722 y 1728. En el período de 1715 a 1740 el RAI alcanzó a realizar 82 operaciones de fiado por valor de \$935.420.

Pero, las primeras reformas borbónicas de la post-guerra lograron rescatar a Buenos Aires del control británico en aras del monopolio gaditano, al tratar de cortar los privilegios y monopolios del Real Asiento de Inglaterra (RAI) mediante sucesivas confiscaciones. En la primera confiscación del RAI (1718-22), provocada por la guerra que mantuvo España contra Francia, Inglaterra y Holanda, el Gráfico A-I y la Tabla A-II demuestran que el crédito mercantil cayó un 76%, de 56 operaciones por \$443.931 en 1718 a 45 operaciones por \$107.659 en 1719, reduciéndose progresivamente hasta alcanzar en 1722 su cota más baja, con 23 operaciones por \$16.859. Por el contrario, el crédito hipotecario aumentó, de una obligación a censo por \$1.000 en 1716 a 5 y 7 obligaciones por \$23.000 y \$43.000 en 1717 y 1718 respectivamente; el mercado inmobiliario urbano (MIU) creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de \$9.000 en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$17.000 en el bienio 1719-20; el mercado inmobiliario rural (MIR) se incrementó, de 10 operaciones en 1720, por valor de \$4.325, y correspondientes a 23.750 varas lineales, a 21 por valor de \$49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas lineales; y el mercado de mano de obra esclava (MMOE) creció de un promedio de 15 operaciones anuales por valor de \$4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el quinquenio 1719-23. Paralelamente, la corona comenzó a otorgar a diversos comerciantes españoles permisos de registro con licencias de internación que implicaban la autorización de extraer el equivalente de lo importado en plata doble, lo que le hacía difícil

al RAI lucrar con creces mediante el contrabando. A fines de 1721 se le concede permiso de registro a Salvador García Posse, quien alcanzó a concertar en 1723, siete operaciones de fiado por un valor total de \$49.139, y en 1729, una operación por valor de \$36.000. Durante la segunda confiscación (1727-30), el Gráfico A-I y la Tabla A-II ilustran como el crédito mercantil cayó un 70%, de \$407.749 en 1727 a \$121.889 en 1728. Podemos deducir de estas cifras, que ambas guerras confiscatorias golpearon al comercio legal español, mucho menos que la Guerra de Sucesión de España. Por el contrario, el crédito hipotecario aumentó, de tres (3) obligaciones a censo por \$2.840 en 1726, a siete (7) imposiciones a censo por \$9.000 en 1727, y una docena de obligaciones a censo por \$10.000 en 1728; el MIU creció de un promedio de 51 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74 operaciones anuales por valor de \$40.000 en el trienio 1728-30; y el MMOE creció casi un 100% de un promedio de 33 operaciones anuales por valor de \$10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68 operaciones anuales por valor de \$18.000 en el cuatrienio 1727-30.

## **K-VI El comercio de los Navíos de Registro.**

En la sub-metrópoli porteña, Buenos Aires, el comercio a larga distancia se halló en un comienzo monopolizado por los llamados Registreros. Una vez producida la segunda confiscación del Real Asiento de Inglaterra (RAI), a fines de 1729, arribaban a Buenos Aires los navíos de los Registreros Francisco de Alzáibar y Cristóbal de Urquijo, los que revitalizaron el alicaído comercio porteño. En la docena de años que Alzáibar operó en el Río de la Plata (1730-42), alcanzó a concretar 42 operaciones de fiado por valor de \$117.735. Fue, sin embargo, en los años de 1734 y 1735 cuando mayor fue su actividad. En el primero de estos años concretó cinco operaciones por valor de \$12.672, y en el segundo celebró siete operaciones por valor de \$70.749. Pero no sólo los comerciantes dueños de navíos de registro lucaban en este negocio. Lo hacían también sus factores, encomenderos y apoderados. Este fue el caso en orden decreciente de Nicolás de la Quintana con 21 operaciones por valor de \$192.000; de Nicolás de Echalecu con 24 operaciones por valor de \$110.000; Pedro Antonio Warnes con 17 operaciones por valor de \$107.000; Pedro Prudencio Pérez con ocho operaciones por valor de \$103.000; Francisco Ruiloba con 22 operaciones por valor de \$96.594; y Melchor García de Tagle con 14 operaciones por valor de \$79.508. Pocos años después de la caída de Portobello (1740), fueron los navíos de registro de Lorenzo del Arco en las personas de los primos Pedro de Lea y Arco y Manuel del Arco, los que revitalizaron el comercio del Atlántico sur. En los ocho años que los primos Del Arco operaron en el Río de la Plata (1744-52), alcanzaron a concretar 193 operaciones de fiado por valor de \$1.273.000. Sin embargo, fueron los bienios 1744-45 y 1748-49 los que registraron la actividad más intensa. En el primer bienio consumó 117 operaciones por valor de \$645.000 y en el segundo 53 operaciones por valor de \$382.000.

De resultas del comercio intérlope con la Colonia del Sacramento, el Gráfico A-I y la Tabla A-II ilustran como el crédito mercantil creció de 247 operaciones por 1 1/2 millón de pesos en 1748 a 420 operaciones por 3 1/2 millones en 1749 y a 800 operaciones por 5 millones en 1751, registrándose en esta coyuntura el pico más alto de la serie. La inflación del crédito mercantil empezó a traer como efecto tardío, una espiral de cesiones de crédito. La abrupta introducción de mercadería Europea vía Colonia del Sacramento, a una escala hasta entonces nunca vista y destinada parcialmente a renovar el capital fijo de los ingenios de moler metal Alto-peruanos, y la creciente demanda de cueros por parte de los barcos

surtos en el Puerto, que entre los años 1745 y 1753 alcanzó al 33%, drenó el circulante metálico existente en el mercado porteño, generando una acuciante escasez.<sup>817</sup> Esta escasez, explica la incipiente sustitución de circulante metálico en las transacciones mayoristas por el circulante escriturario proveído por las cesiones de crédito. En la cesión de créditos es preciso distinguir la cesión de créditos vencidos de aquellos aún no vencidos. Los primeros eran adquiridos por aquellos cesionarios más capaces de ejecutar a los deudores. Los segundos eran adquiridos con descuentos proporcionales a los plazos faltantes para sus respectivos vencimientos. El volumen de cesiones de crédito (CCM), de acuerdo a la Tabla A-II, creció en 1752 un 64% y en 1755 un 80%, de 6 operaciones por \$44.000 en 1749 a 16 operaciones por \$123.000 en 1752. El boom mercantil también se tradujo en 1752 por un record en el número de capellanías y cartas dotalas registradas, en las ventas de oficios venales concertadas, y en el número de mozos de tienda contratados. En efecto, según el Gráfico A-III y la Tabla A-III, el número y monto de las capellanías aumentó de dos capellanías por valor de \$1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de \$15.500 en 1752.

Pero, en 1754, una sobreoferta de mercadería Europea provocó en Buenos Aires por vez primera una crisis comercial propiamente dicha, es decir no vinculada con un acontecimiento guerrero. Como consecuencia también del Tratado de Paz de Madrid, celebrado en 1750 y la devolución de la Colonia del Sacramento a España en 1751, el crédito mercantil declinó un 62%, de 900 operaciones por 4 millones en 1753 a 500 operaciones por 1 1/2 millones en 1754; y las cesiones de crédito siguieron el ejemplo al cabo de un año calendario, reduciéndose de 35 operaciones por \$219.000 a 30 operaciones por \$85.000.

Las demandas por cobro de pesos, las quiebras y las fianzas de cárcel son también un testimonio de las crisis.<sup>818</sup> Durante la crisis de 1754 los Jueces de Paz procesaron un número de demandas por cobro de pesos sin precedentes. Aunque los números puedan parecer pequeños, la economía de Buenos Aires nunca los había experimentado. En 1754, fueron registradas diez demandas para cobrar deudas y en 1755 una quincena por el mismo concepto. Mayo y Latrubesse de Díaz (1983) ilustraron la inquietante situación generada por esta crisis mediante el epistolario dirigido desde Buenos Aires por la mujer de Fernando Mazeira, un comerciante residente en Asunción. Con relación a las prisiones por deudas, la Tabla A-VIII ilustra como en 1754 fueron emitidas a favor de deudores insolventes cinco fianzas de cárcel y nueve en 1757. En noviembre de este último año, durante las primeras batallas de la Guerra de los Siete Años, la tasa de riesgo de mar subió al 40% (Tabla A-IX).

Aunque España no participó en esta guerra hasta que el Pacto de Familia fue firmado en enero de 1762, el comercio Español con sus colonias Americanas, experimentó las mismas tasas de riesgo y similares crisis comerciales. Por de pronto, el crédito mercantil decreció de 476 operaciones por 1 1/2 millón en 1756 a 237 operaciones por 1/2 millón en 1758, y de 408 operaciones por un millón en 1759 a 237 operaciones por \$350.000 en 1760. Con un efecto tardío de un año, las cesiones de crédito continuaron la tendencia marcada por el fiado de Castilla. Después que se hubieren registrado en 1759 un millón de pesos en concepto de mercaderías fiadas, se concertaron en 1761 una treintena de operaciones de cesión de créditos por valor de \$150.000, y cerca de cuarenta operaciones por \$196.000 en 1762. Por el contrario, según el Gráfico A-IV y la Tabla A-IV, el crédito hipotecario creció, de 5 obligaciones a censo por valor de \$4.000 y 3 imposiciones a censo por valor de \$790 en 1761, a 15 obligaciones a censos por valor de 17.261 en 1762 y 32 obligaciones a censo por valor de \$29.135 en 1763; el MIU creció de

un total de 59 operaciones por valor de \$48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por valor de \$83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de \$87.000 en 1762; y el MMOE creció de un total de 111 operaciones por valor de \$25.000 en 1756 a un total de 165 operaciones por valor de \$32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de esclavos comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al 23% (Tabla A-V).

A medida que la economía española comenzó a recuperarse y expandirse a mediados del siglo XVIII, el poder económico fue perceptiblemente girando hacia la periferia; en la metrópoli hacia áreas tales como Cataluña y la región Vasca, y en las colonias hacia áreas tales como Guatemala, Nueva Granada, Chile, y el Río de la Plata.<sup>819</sup> Los comerciantes de esas áreas obtuvieron, gracias a una Real Orden, fechada en Junio de 1749, total libertad para sus giros. No fue ya necesario por el momento que los comerciantes residentes en la América colonial consignaran sus remesas de plata y oro. Este transitorio éxito político de las burguesías mercantiles del Río de la Plata, Chile y la Nueva Granada representó un paso muy importante en la quiebra del sistema de Flotas de Galeones. Desde entonces, la emigración de comerciantes españoles hacia territorios coloniales periféricos, consignatarios de casas mercantiles Catalanas y Vascas, influirá decisivamente en el cambio de estas colonias hispano-americanas desde una posición periférica hacia posiciones semi-periféricas, mejorando relativamente sus perspectivas secesionistas.<sup>820</sup> De igual forma, la fundación de Casas de Moneda en Santiago de Chile y en Popayán, en la década del 40, reforzó el vigor de sus respectivas burguesías mercantiles coloniales. Asimismo, la inauguración de los navíos de registro, a partir de la caída de Portobello (1740), fuera de los convoyes de flotas y galeones, y la fundación en 1748 de la Administración de Correos en Buenos Aires aceleró la velocidad de circulación del dinero y del crédito.<sup>821</sup>

## **K-VII El comportamiento de las cesiones de crédito.**

Habiéndose diversificado y descentralizado el control monopólico del crédito mercantil con la instauración de las Reformas Borbónicas, el comportamiento de las cesiones de crédito no podían estar ajenas al nuevo impacto del crédito. La más dinámica realidad económica acortaba el plazo en que el crédito mercantil influía sobre las cesiones de crédito. En otras palabras, el dinamismo alcanzado por el circulante se hizo más sensible a la inyección de nuevas emisiones de crédito mercantil. Así observamos como, cuando el crédito mercantil crece de 186 operaciones por \$637.000 en 1778 a 208 operaciones por \$1.130.000 en 1779, las cesiones también suben de un par de operaciones por \$4.751 en 1778 a catorce operaciones por \$45.000 en 1779 y una quincena por \$49.000 en 1780.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. Pero las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia mercantil ascendente, que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. De todas formas, la balanza comercial acusa un déficit alarmante, pues las importaciones alcanzan en 1778 a los \$840.833 y las exportaciones a los \$175.846. El boom de las importaciones continúa en 1779 con \$1.303.400 y en 1780 con \$1.233.000. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83) tan pronto como España se sumó

a la misma (1780) el crédito mercantil, ilustrado en el Gráfico A-I y la Tabla A-II, cayó de un par de centenar de operaciones por \$1.100.000 en 1779 a casi un centenar y medio por \$440.000 en 1780, alcanzando su nivel más bajo en 1782 con 94 operaciones por \$345.000 y las importaciones se redujeron en 1781, a \$81.933. La crisis mercantil se tradujo también en 1780 en un pico mínimo en el número de capellanías y cartas dotales registradas, en las ventas de oficios venales concertadas, en el número de asistencias otorgadas para sentar plaza de cadete, y en el número de mozos de tienda contratados. En efecto, según la Tabla A-III, el número y monto de las capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 en 1780 y 1781 respectivamente. Por el contrario, según la Tabla A-IV, el número de censos creció, de 6 y 11 obligaciones e imposiciones a censo por valor de \$7.068 y \$11.050 en 1778 y 1779 respectivamente, a 21 obligaciones e imposiciones a censo por valor de 19.096 en 1780; el MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de \$82.000 en 1780, a 214 operaciones por valor de \$162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de \$236.000 en 1782; y el valor de las operaciones del MIR se sextuplicaron de un total de \$5.862 en 1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a \$29.915 en 1781, correspondientes a 23.641 varas lineales. En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) el MMOE creció tres (3) puntos logrando un promedio del 7% (Tabla A-V). Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso le fue preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el otorgamiento de las ordenes sagradas. Asimismo, al caer la capacidad de otorgar cartas dotales para casar a su prole, las elites se vieron obligadas a flexibilizar sus pretensiones étnicas. La acumulación de estas crisis mercantiles deben haber alimentado sendas crisis en los aparatos eclesiástico y militar del estado colonial.

Pero al igual que en 1754, no sólo los momentos de guerra marcaban la oportunidad de las crisis. En 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, montando lo importado más de 6 1/2 millones de pesos, lo fiado al interior casi 400 operaciones por más de 3 millones de pesos (2 millones menos que en la década del 50), y lo exportado en plata apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los precios. Tal como lo aseveró Puiggrós (1940), si bien los comerciantes porteños habían conquistado el monopolio del mercado interior al eliminar políticamente la competencia Limeña, perdieron la corriente comercial anglo-portuguesa al restringir el contrabando.<sup>822</sup> En los dos años siguientes, 1786-87, los precios se equilibraron porque las importaciones y las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la balanza comercial se vuelve a desequilibrar, tanto en el Río de la Plata como en Chile, en cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las exportaciones de plata a sólo 2 1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los precios y una consecuente caída del fiado que alcanza sólo a un par de centenares de operaciones por poco más de 700.000 pesos.<sup>823</sup>

## **K-VIII Guerras de Coalición contra la Francia Revolucionaria.**

No todas las guerras provocadas por la Revolución Francesa se vieron reflejadas en las estadísticas. Como en la guerra de la primera Coalición contra Francia (1791), España jugó del lado de Inglaterra, su comercio de ultramar no se vio afectado. Pero una vez que España tomó partido por Francia contra Inglaterra y sus aliados, el comercio ultramarino se vio duramente golpeado. El crédito mercantil cayó de 195 operaciones por \$864.000 en 1796 a 130 operaciones por \$416.000 en 1797. Con el desencadenamiento de la guerra continental, en 1798, es cuando las importaciones caen en forma abismal de \$1.800.000 en

1797 a los \$154.000 en 1798; y las exportaciones de plata de 3 millones en 1797 a sólo \$50.000 en 1798. En cuanto a los bienes de renta, el MIU creció de un total de 118 operaciones por valor de \$54.000 en 1794, el año de más baja actividad desde la Paz de Versailles (1783), a un total de 143 operaciones por valor de \$136.000 en 1795. La tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y se prolonga al inicio del siglo siguiente.

La respuesta clave para explicar la desaparición del comercio de comisión (fiado otorgado en Cádiz) la encontró García Baquero (1977), en el abandono de Cádiz por parte de los comerciantes extranjeros cuando España tomó partido por Francia. En efecto, comenzando con el decreto de Libre Comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales de Carlos IV (1797), la presencia de extranjeros y de comerciantes criollos en los puertos de España, para que España pudiera comerciar con sus colonias ya no era más necesaria. Los comerciantes extranjeros podían comerciar, libremente, desde cualquier puerto del continente que quedara neutral en el conflicto de Inglaterra con España. Desde ese momento, los extranjeros y los criollos podían ignorar a los comerciantes de Cádiz que servían de intermediarios. Más aún, debemos recordar que durante las guerras, debido al bloqueo de su bahía, Cádiz era prácticamente una plaza sitiada. Esto ayuda a explicar el abandono de Cádiz por los extranjeros y los criollos americanos en búsqueda de lugares más seguros, para practicar sus negocios.<sup>824</sup>

De repente, con la breve paz declarada en 1799, la tasa de riesgo de mar descendió un 16% (Tabla A-IX), provocando no sólo la abolición del Decreto sobre el libre comercio con Colonias Extranjeras y en Buques neutrales, sino también el incremento del 86% en las importaciones, del 50% en el monto de capitales asociados en compañías (Tabla A-X), y del 34% en el crédito mercantil durante aquel año y del 50% en 1800.<sup>825</sup> En efecto, el crédito mercantil aumentó de 132 operaciones por \$429.000 en 1798 a 144 operaciones por \$643.000 en 1799, y 136 operaciones por \$850.000 en 1800. La guerra entre Inglaterra y Francia, con España de aliada de esta última, que se desató nuevamente a fines de 1799 se reflejó en los mercados de bienes de renta. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. Y el mercado de embarcaciones fluviales y marítimas, inflado por el cambio de banderas, creció de un total de 23 operaciones por valor de \$73.720 en 1800 a un total de 37 operaciones por valor de \$174.000 en 1801.

Durante el breve período de paz (1802-03) que siguió al Tratado de Amiens (1802), que concluyó la guerra de la segunda Coalición contra Francia (1799-1802), las importaciones desde España crecieron un 72% en 1802, ascendiendo a casi el millón de pesos, para finalmente, con la Paz de Amiens, superar el millón y medio de pesos; y el crédito mercantil creció de 129 operaciones por \$585.000 en 1801 a 115 operaciones por \$612.000 y 137 operaciones por \$844.000 en 1802 y 1803 respectivamente. Algunos de los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.<sup>826</sup> El precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla A-V).

Con la renovación de la guerra entre Inglaterra y Francia, con España de aliada de esta última, en 1804, y gracias al comercio de intermediación norteamericano, el crédito mercantil experimentó un incremento en lugar de una caída y los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. En efecto, el CM creció de 137 operaciones por \$844.000 en 1803 a 177 operaciones por \$1.072.000 en 1804, y 124 operaciones por \$1.000.000 en 1805. Con relación al MMOE, este experimentó un alza del 13% (Tabla A-V).

Debido a las Invasiones Inglesas (1806-07), el comercio de consignación con el interior decayó. El crédito mercantil descendió un 33%, de 124 operaciones por un millón de pesos en 1805 a un centenar por \$670.000 en 1806 y medio centenar por \$242.000 en 1807. Y lo mismo ocurrió con los bienes de renta. De un total de 211 operaciones inmobiliarias urbanas por valor de \$295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un 50%, a un total de 131 operaciones por valor de \$157.000.

Luego que Buenos Aires fue reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a Buenos Aires.<sup>827</sup> Como consecuencia de ello, el crédito mercantil creció un 220%, de 82 operaciones por \$276.000 en 1808 a un centenar de operaciones por \$535.503 en 1809 (Gráfico A-I y Tabla A-II). El número y monto de las obligaciones e imposiciones a censo se incrementan en forma gradual, de 15 imposiciones a censo por valor de \$16.651 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 obligaciones e imposiciones a censo, por valor de \$26.849, \$48.576, \$45.087, y \$32.620 en 1800, 1801, 1802, y 1803 respectivamente. También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos aumentan de dos censos por valor de \$1.335 en 1800 a 25 censos por valor de \$77.381 en 1801.<sup>828</sup> Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron drásticamente, de 22 censos por valor de \$32.620 en 1803 a 12 censos por valor de \$16.150 en 1804, 4 censos por valor de \$4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un pico máximo de 20 censos por valor de \$107.053 en 1805 a 13 censos por valor de \$59.414 en 1806, y 5 censos por valor de \$6.287 en 1807.<sup>829</sup> Asimismo, el mercado de bienes de renta experimentó las consecuencias del arribo en aluvión de mercadería inglesa. El MMOE creció de \$59.176 en 1807 a \$80.800 en 1808, o el 27% (Tabla A-V). El MIU subió de \$157.022 en 1807 a \$413.018 en 1808 o el 263%, y a \$629.579 en 1809 o el 400%. En cuanto al MIR, este creció de 9 operaciones por valor de \$6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor de \$144.554, en 1808.<sup>830</sup>

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de los numerosas tablas y gráficos aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores monopolistas más tradicionales. Las reiteradas crisis mercantiles y su efecto acumulativo, que acabó con el crédito comercial, afectaron profundamente la estabilidad social colonial para desatar finalmente sus contradicciones a comienzos del siglo XIX.

## **Epílogo Sección I-C**

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de

extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña.

Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.<sup>831</sup> Asimismo, la escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre en el Río de la Plata, presidió el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba.<sup>832</sup> La escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.<sup>833</sup> La extrema fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellanico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.<sup>834</sup> La centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias alentó el desarrollo de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones como los derechos de abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y censos en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

En materia de crédito y circulación mercantil, reconocemos en la primera parte del siglo XVII, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Y en el siglo XVIII, una vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a estar directamente ligada al mercado mundial, como en la primera mitad del siglo XVII, descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de desarrollo mercantil-absolutista. En este período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981, 1985), y repetido por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al período que lo precedió.<sup>835</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue el más significativo de todos, no ha merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.<sup>836</sup>

Si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; sobre la base de las numerosas listas, cuadros y apéndices hemos concluido que la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, y había logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias

abajañas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

En cuanto a la crisis en la Banda Oriental, debemos concluir que su causa fundamental residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias, y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda Oriental residiría entonces del lado de la oferta de mano de obra rural, debido al fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

## **Sección I-D Valorización de tierras, casas y brazos.**

La tradición historiográfica había señalado repetidamente que la movilidad social en la América Latina colonial padecía de una estabilidad asfixiante.<sup>837</sup> Sin embargo, admitida la inevitable movilidad social existente en el comercio, numerosos trabajos, referentes a las ciudades de Buenos Aires, Lima, La Paz, Santiago de Chile, Guatemala, Córdoba, Corrientes y Salta han proveído de materiales que nos permiten suponer, que en algunas ciudades Latinoamericanas se había dado en tiempos coloniales con motivo de la valorización de casas y sitios urbanos una intensa movilidad social.<sup>838</sup> Y refiriéndose al Alto Perú, Chile, Perú y México pre-revolucionarios, ciertos autores han insistido últimamente, que también en el agro latinoamericano se había dado en tiempos coloniales con motivo de la valorización de las tierras de chacra y estancia una considerable movilidad social.<sup>839</sup>

En efecto, en esta sección, dedicada a investigar las relaciones etnológicas de naturaleza económica, como ser la valorización de tierras, casas y brazos, trato en tres (3) capítulos consecutivos: el mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII), el mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario, y el mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo).

### **Capítulo I-D-12**

#### **Mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII).**

### **Índice**

- L-I Mercado inmobiliario urbano (MIU).
- L-II Rotación sufrida por cada predio en forma individual.
- L-III Persistencia en el dominio urbano.
- L-IV Régimen capellánico y la propiedad urbana.
- L-V Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.
- L-VI Sobre-valorización inmobiliaria urbana.
- L-VII Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.

## **Introducción del capítulo I-D-12**

Hace más de una década Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981), sostuvo que los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>840</sup> Siguiendo estos argumentos, la escasez de tierra urbana habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),<sup>841</sup> y el régimen capellánico, a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de los inmuebles urbanos.

La inversión en casas y solares urbanos revelaba para un comerciante, hacendado, artesano o liberto la fuente más importante de movilidad social vigente en ese entonces. Blackmar (1980) y Jensen (1963), hallan en el caso de las ciudades de Nueva York y Filadelfia; De Vries (1984), Hart (1989), García-Baquero (1979), Gonsález de Molina y Gómez Oliver (1987) y Cruz (1990), en el caso de las ciudades Europeas, y en los tres últimos en los casos específicos de Cádiz y Madrid, que el mercado inmobiliario urbano del Antiguo Régimen no fue tan estático como se lo solía pintar, y que la propiedad cambiaba de dueños en espacios de tiempo muy cortos.<sup>842</sup> Pero lo particular de los casos que se dieron en el mundo colonial Americano es que los vecinos propietarios constituían una clase étnicamente heterogénea. Había en el Río de la Plata, a diferencia de Europa, tal como lo prueba Rosal (1988), pequeños propietarios que eran mulatos y negros libres.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos elaborado un Cuadro y numerosas Tablas, y procesado la información de diversos padrones de época, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de escrituras notariales, todas ellas depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>843</sup> También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>844</sup> así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>845</sup>

### **L-I Mercado inmobiliario urbano (MIU).**

La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en bienes inmuebles urbanos (casas, sitios y solares) revelaría entonces, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles rurales, la crónica inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo intenso de la movilidad social ascendente y descendente vigente en ese entonces. Durante el siglo XVIII el mercado inmobiliario urbano (MIU) del litoral del Río de la Plata se mantuvo con algunos altibajos en una tónica por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 419 operaciones notariales, sobre sitios y

casas,<sup>846</sup> en Buenos Aires, en el mismo período se registraron 6.554 operaciones notariales, y desde 1700 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 12.831 operaciones sobre sitios y casas. El Gráfico D-I, fundado en la Tabla E-I, ilustra las fluctuaciones del MIU. Durante la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1718-22), el MIU creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de \$9.000 en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$17.000 en el bienio 1719-20. Durante la segunda confiscación (1727-30), el MIU creció de un promedio de 51 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74 operaciones anuales por valor de \$40.000 en el trienio 1728-30. En tiempos de paz, estos indicadores sufrían un relativo descenso en virtud de la cristalización provocada por otras alternativas de inversión más lucrativas. Gran parte de la baja experimentada por el MIU debió haber sido ocasionada por el loteo del ejido que se iniciara en 1730 y durara hasta 1744. Es luego de la caída de Portobello en 1740 y el consiguiente cambio de las rutas del comercio español del Caribe al Pacífico a través del Cabo de Hornos, que el MIU experimenta un boom sostenido del que no habrá de retornar. En efecto, mientras en la década previa a la caída de Portobello (1731-40), se registraron un promedio de 53 operaciones anuales por valor de \$17.000, en la década posterior (1741-49) el MIU se duplicó alcanzando un promedio de 88 operaciones anuales por valor de \$34.000. Con la Guerra de los Siete Años (1756-63) los mercados de bienes de renta también experimentaron un fuerte impacto. Según la Tabla E-I, el MIU creció de un total de 59 operaciones por valor de \$48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por valor de \$83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de \$87.000 en 1762. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la tierra urbana, que alcanzó al 37%.<sup>847</sup> También durante la Guerra de la Revolución Americana (1776-83), luego que España toma partido a favor de Francia y la emancipación norte-americana, el MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de \$82.000 en 1780, a 214 operaciones por valor de \$162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de \$236.000 en 1782. En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los mercados de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MIU creció 10 puntos de porcentaje, alcanzando un promedio del 19% del mercado crediticio, y el MH (mercado hipotecario) creció 3 puntos alcanzando el 8%. Como consecuencia de las Guerras de la Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial española, experimentan un impacto aún mayor que en la guerra precedente debido al éxodo de comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial porteña. El MIU creció de un total de 118 operaciones por valor de \$54.000 en 1794, el año de más baja actividad desde la Paz de Versailles (1783), a un total de 143 operaciones por valor de \$136.000 en 1795. La tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y se prolonga al inicio del siglo siguiente. El breve período de paz entre 1799 y 1802 afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. La tendencia alcista sufre una aguda crisis con motivo de las Invasiones Inglesas. En efecto, de un total de 211 operaciones por valor de \$295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un 50%, a un total de 131 operaciones por valor de \$157.000. El breve período de paz entre 1799 y 1802 afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. Con la reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en 1804, los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. El MIU subió de \$157.022 en 1807 a \$413.018 en 1808 o el 263%, y a \$629.579 en 1809 o el 400%. Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado inmobiliario urbano

(MIU) debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de casas, solares y sitios, y el incremento de la inmigración masculina adulta.

## **L-II Rotación sufrida por cada predio en forma individual.**

Amén del estudio del mercado inmobiliario urbano es preciso también estudiar la rotación sufrida por cada predio en forma individual. A sólo 313 predios del mercado inmobiliario urbano, pertenecientes a cinco barrios del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que experimentaron más de una transacción, se les pudo reconstruir parte de su historia dominial. Las operaciones correspondientes a dichos 313 predios pertenecían a 1.307 escrituras, sobre un total de 11.662 compraventas, protocolizadas entre 1736 y 1820. Sobre la base de esta reconstrucción, en el barrio de Concepción, 71 parcelas experimentaron cuatro propietarios o tres rotaciones o transacciones; 32 parcelas cuatro transacciones; y 20 parcelas cinco transacciones; totalizando 123 parcelas y 441 transacciones, o casi la tercera parte del total de parcelas y transacciones. El Cuadro C-I ilustra como el barrio con el menor promedio de transacciones por parcela fué el del Socorro, con un promedio de 1,5; totalizando 53 parcelas y 190 transacciones, o la sexta parte del total de parcelas y transacciones; y el de mayor promedio el barrio de la Piedad, con una media de 14 transacciones; totalizando 47 parcelas y 174 transacciones. En el barrio del Retiro, la media alcanzó a 9; totalizando 45 parcelas y 329 transacciones. Y en el barrio de San Miguel, la media alcanzó a 8; totalizando 45 parcelas y 173 transacciones.

## **L-III Persistencia en el dominio urbano.**

Las propiedades que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación fueron muy escasas. Las pruebas de la persistencia en el dominio estaban dadas por el régimen del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo, y el retracto, y el régimen capellánico. Es de presumir que el derecho de abolengo, institución típicamente feudal, prevaleciera más en el campo que en la ciudad. Sin embargo, en Buenos Aires, Pedro Caro, marido de Antonia Martínez Aguirre, inició juicio de retracto a Miguel Antonio Requejo, por la venta de un sitio que fuera de su suegro Pedro Martínez Basualdo, natural de Corrientes, y de su suegra Luisa Aguirre, que le vendieran Juan Pérez y Antonio Pita, marido éste último de Francisca Martínez Aguirre.<sup>848</sup> El Cap. Baltasar de Quintana Godoy inició a comienzos del siglo XVIII juicio de tanteo al Cap. Francisco de la Cámara y Anastasia de Quintana, por la venta de las casas de su padre Francisco de Quintana.<sup>849</sup> En 1715, el Cap. Francisco de Merlo pidió por el tanto el sitio que perteneciera a sus padres, el Cap. Alejandro de Merlo de Lafuente y María Ardiles de la Mota, vendido por su sobrino el Alf. Francisco López al Cap. Pedro de León.<sup>850</sup> En 1793, el Dr. Mariano Zavaleta inició juicio de retracto a su tío materno carnal Toribio de Aramburu por la casa que fuera de sus abuelos maternos el Cap. Bartolomé de Aramburu y María Ruiz de Ocaña.<sup>851</sup> En 1816, Manuel de Arribáizaga dedujo una acción de retracto a favor de Francisca Pereyra, mujer de Pedro José de Arroyo, contra su coheredero Ilario Niquilson.<sup>852</sup>

## **L-IV Régimen capellánico y propiedad urbana.**

El régimen capellánico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la perpetuidad y la concentración de la propiedad urbana. En La Paz, Alto Perú, se siguió en 1780 un dilatado

pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero, sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.<sup>853</sup> El patronato se fundó, entre otras numerosas propiedades, sobre una casa frontera a la del Sr. Dr. Miguel Núñez de Sanabria, Oidor que fue de la Real Audiencia de Charcas, por el principal de \$4.000.<sup>854</sup> Dicho Patronato quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.<sup>855</sup> De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.<sup>856</sup> En Córdoba, la crisis desatada en su Cabildo en 1766 obedeció en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía de \$2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.<sup>857</sup> Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.<sup>858</sup> Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.<sup>859</sup> Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el reembolso de la suma correspondiente.<sup>860</sup> En Buenos Aires, Don Ambrosio del Casal y Sanabria, hijo de Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y Sanabria,<sup>861</sup> compareció en 1795 ante el Alcalde de segundo voto y dijo que conforme al testamento instituido por Ana del Casal y Sanabria,<sup>862</sup> a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su pariente el Deán de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,<sup>863</sup> para que fundara dos capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los seculares-- de dos mil pesos de principal cada una.<sup>864</sup> Fundadas ambas capellanías en 1768, sobre las casas antigua y nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados a éstas lo fueron en el primer caso los hijos y descendientes de sus legítimos hermanos Pedro y José del Casal y Sanabria,<sup>865</sup> vecinos del Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por su falta a los hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña Ana [Domínguez] Rabanal y Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los hijos y descendientes legítimos de las líneas de mis primas hermanas Doña Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa Rivarola y Don Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entiéndese primero los de la línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".<sup>866</sup>

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su Patronato

"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor fuere mujer, pase al varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea se conserve dicho Patronato con la preferencia del varón a la mujer".<sup>867</sup>

En 1773, el Provisor y Vicario General Juan Baltasar Maciel, a pedimento del Capellán de la Iglesia de San Isidro, trabó embargo a la fundadora de la correspondiente capellanía, Tomasa Acasuso, por los \$2.000 que estaban afincados sobre su casa.<sup>868</sup> Quince años después, en 1787, el Mro. Narciso Cabral puso demanda en Buenos Aires al Cap. Francisco Piera,<sup>869</sup> propietario de una casa gravada con una capellanía por valor de \$2.020, por adeudarle los réditos caídos "...correspondientes a 17 años en que no se dignó avisarme de mi derecho".<sup>870</sup> A fines de siglo, en 1799, el Cura colado y Vicario de la Doctrina de Carasa Pbro. Juan José Rodríguez Pestaña reclamó en Buenos Aires de su tío materno el Capitán de Dragones Juan Amaro Pestaña,<sup>871</sup> los intereses recaudados pertenecientes a una capellanía de \$2.000, fundada en 1784 por el Teniente Francisco Sánchez, sobre las casas de su tía Josefa Gabriela Rodríguez,<sup>872</sup> existentes en Montevideo.<sup>873</sup> En vísperas de la revolución de independencia, en 1809, el Dr. Pedro José Denis,<sup>874</sup> demandó en Buenos Aires a Miguel Planes,<sup>875</sup> dueño de una casa-panadería, por el cobro de los réditos de una capellanía fundada por su tío abuelo el Dr. Francisco de Cossio y Terán,<sup>876</sup> situada o fundada en la casa de Planes.<sup>877</sup> Una década más tarde, en 1819, el hijo de Miguel Planes, el Pbro. Dr. Saturnino Planes,<sup>878</sup> le inició a su propio padre una acción ejecutiva por los réditos vencidos de una capellanía impuesta a su favor sobre la casa-panadería de su propiedad.<sup>879</sup> En represalia, su padre alegaba, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel García de la Huerta, que estando

"...en una edad avanzada, cerca de ochenta años, sin entretenimiento ni ejercicio lucrativo alguno ni en aptitud de poderlo practicar, debiendo el referido mi hijo por tan dobles obligaciones, respetarme, atenderme, y alimentarme, cumpliendo con el 4o. precepto del Decálogo",<sup>880</sup>

no sólo como hijo legítimo "...sino también como eclesiástico y de conocimientos en la moral",<sup>881</sup> tan lejos de llenar estos deberes, "...es el que más se interesa en mi destrucción, en mi ruina, en mi oprobio, y en las continuas afrentas, con que sin intermisión me dilacera".<sup>882</sup> En 1812, como el Pbro. José Reyna,<sup>883</sup> reclamaba los réditos de su capellanía, el Gobierno se la suprimió otorgándosela en su lugar al Dr. José Luis Planchón.<sup>884</sup>

## **L-V Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.**

Asimismo, los censos y reconocimiento de censos coadyuvaron al proceso de indivisibilidad y la alta rotación de la propiedad inmueble urbana. En el caso de Buenos Aires, por cuanto la mayoría de los censos y reconocimientos de censos celebrados en Buenos Aires fueron practicados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real de las mismas. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles urbanos, los cuales se hallan incluidos en la Tabla E-II. Una veintena de comerciantes contrajo censos y reconocimientos de censos con más de un par de instituciones religiosas.<sup>885</sup> Con los años muchas casas fueron tan desmedidamente gravadas que toda la renta proveniente de sus alquileres iba para el pago de los réditos debidos a los censos contraídos. Quince ricos vecinos, detallados en la Tabla E-II, formalizaron a lo largo del siglo XVIII 55 operaciones de censo con instituciones eclesiásticas por valor de \$134.392, sobre un total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole por valor de

\$1.094.332, es decir el 13%. Cuando el comerciante Francisco Álvarez Campana contrajo entre 1752 y 1758 cuatro operaciones de censo por valor de \$24.000, y entre 1751 y 1763 tomó fiado en una docena de operaciones mercadería por valor de \$86.056, adelantó entre estos últimos años un total de 173 operaciones de fiado por un monto de \$159.041. En el caso del comerciante Juan Antonio Albarracín, mientras entre 1769 y 1777 había adelantado una docena de operaciones por valor de \$33.171, entre 1793 y 1796, una vez retirado del comercio activo, contrajo un par de operaciones de censo por valor de \$10.000. Francisco Pérez de Saravia, un comerciante conocido por sus proclividades interés, cuando entre 1762 y 1769 adelantó media docena de operaciones de fiado por valor de \$9.132, el año de la Paz de París (1763) contrajo un par de operaciones de censo por valor de \$3.000. Francisco Rodríguez de Vida, cuando entre 1747 y 1757 contrajo cuatro operaciones de censo por valor de \$6.900, y en 1760 tomó en una sola operación de fiado mercadería por valor de \$31.200, entre 1743 y 1762 adelantó 73 operaciones de fiado por valor de \$355.865. Y Pablo Thompson, cuando en 1763 y 1767 contrajo dos operaciones de censo por valor de \$5.500, y entre 1760 y 1761 tomó fiado en tres operaciones mercadería valuada en \$13.740, entre 1759 y 1761 adelantó una veintena de operaciones de fiado por valor de \$46.860, y entre 1764 y 1778, 64 operaciones por valor de \$164.760.

## **L-VI Sobre-valorización inmobiliaria urbana.**

La sobre-valorización inmobiliaria urbana, producto de la especulación, es factible de ser estimada. Esto puede lograrse mediante la información notarial o fiscal sólo cuando tomamos la información de los predios despoblados. El cálculo de la sobre-valorización fundiaria en los predios edificados se complica por cuanto se debería descontar el precio de las mejoras (ladrillo, madera, albañilería, carpintería, herrería, etc.).<sup>886</sup> Pero los predios edificados sufren también de un proceso de sobre-valorización por el simple juego de la oferta y demanda de habitación o vivienda en una ciudad donde el volumen de la población huésped, con relación a la anfitriona o residente, es abismal en períodos de paz o tregua. No contenta Doña Lucía Saravia con haber subido el arrendamiento de su tienda en la calle de las Torres de \$8 a \$9 cada mes, Juan Antonio Magariños, su inquilino, denuncia en 1785 que Doña Lucía "...me quiso hacer la subida exorbitante y extraña de \$12 cada mes previniéndome que de no pasar por ella me mudase pues tenía sujeto que se los daba".<sup>887</sup> Como Magariños se resistiera, la Saravia acudió al Alcalde de primer voto Don José Antonio Ibáñez, el cual luego de llamarlo, le requirió que se mudase en el término de ocho días.<sup>888</sup> Diez años más tarde, en un incidente de nulidad contra el remate de una finca gravada con una capellanía a favor del Pbro. Lorenzo Gorostidi, Francisco Piñero alega contra Nicolasa Sotelo que "...es tal la rebaja que han padecido los alquileres desde el año de 1788 al presente [1794] que lo menos que puede darse es [un descuento] de un 25%, y este quebranto ocasiona forzosamente el de las casas que lo producen, porque no se han de estimar lo mismo cuando podían redituarse veinte que cuando sólo dan doce".<sup>889</sup> Empecinada la propietaria Sotelo en sostener que los sitios y casas en 1794 poseían mayor valor que en 1779 y 1780, Piñero insiste en que la Sotelo "...se engaña o pretende engañarnos, porque es un hecho que lo saben hasta los que no tienen casas propias por el menor alquiler que ahora [1794] les cuestan las que toman para vivir".<sup>890</sup> Sin embargo, dos años más tarde, en 1796, en un intento por elevar el arrendamiento de los cuartos de su finca, Don Santiago Saavedra,<sup>891</sup> trata de explicarle con criterios puramente mercantiles a Don Santiago de la Prida y demás inquilinos que las casas de alquiler "...son más o menos apreciables según el mayor o menor número de gentes transeúntes y sin arraigo".<sup>892</sup> Para avalar su aserto Saavedra se preguntaba y respondía a sí mismo "...¿que extraño será que en el día tengan un triple valor las casas de alquiler del que tenían 25 años antes?".<sup>893</sup>

Siendo muy raras las embarcaciones que llegaban a Buenos Aires en 1770-71 y, de consiguiente, muy escaso el número de gentes transeúntes, y sin arraigo, era comprensible que, desde que abundaron éstos transeúntes, por la mayor concurrencia de buques provocada por el Reglamento de Libre Comercio de 1778 y la proclamación de la Paz de Versailles de 1783, Saavedra afirmara en 1796 que los propietarios

"...ya tuvieron derecho...para subir el precio a sus fincas de alquiler ¿y qué duda [cabe] que en el día son sin comparación mucho mayor el número de gentes transeúntes y que tienen precisión de abitar en casa alquilada? ¿y por qué no podrán los propietarios subir de precio sus fincas a proporción de que se ha aumentado la población?"<sup>894</sup>

Por otro lado, la sobre-valorización inmobiliaria urbana no fue uniforme en todos los barrios de la ciudad, sino que por el contrario existió un proceso de diferenciación espacial del suelo urbano, que sugiere la existencia de rentas diferenciales por razones de localización y mejoras. Es así que, tomando como período base las décadas inmediatamente posteriores a la Paz de Utrecht (1720-40) y como dimensión a mensurar los cuartos de solar (17 1/2 varas de frente por 70 varas de fondo), el valor de la tierra en la década del 50 se dobló y en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), se cuadruplicó en los barrios de San Pedro, Recio, y San Nicolás (\$100), y se mantuvo constante en el barrio de San Juan (\$50).

Con posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90), la sobre-valorización inmobiliaria urbana sufrió un "boom" mayor aún. Tomando igual período base (1720-40), vemos que mientras en el barrio de San Pedro el valor de la tierra se multiplicó seis veces (\$150) y en el de San Juan se cuadruplicó (\$200), en los barrios Recio y San Nicolás su valor se multiplicó ocho veces (\$200). Es así que la diferenciación espacial del suelo urbano, reflejada en los precios alcanzados en el mercado inmobiliario, confirman la sospecha de la existencia de rentas diferenciales. En tanto que en el período previo a las Reformas Borbónicas el precio de los predios ubicados en los barrios del Retiro y San Juan doblaban el alcanzado en el barrio de la Concepción (\$25), el precio de los predios localizados en los barrios Recio y San Nicolás doblaban los de San Juan y Retiro (\$50).

## **L-VII Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.**

Con el correr del tiempo, el mercado inmobiliario se fue homogeneizando y la diferencia espacial en el valor venal de la tierra entre barrios distintos fue disminuyendo. En efecto, en las décadas posteriores a las Reformas Borbónicas, mientras que los predios ubicados en los barrios de San Pedro, Santa Catalina y Concepción excedían en un 25% el precio del solar en el barrio del Retiro, los localizados en los barrios Recio, San Nicolás y San Juan excedían en un 33% el valor de los ubicados en los barrios de San Pedro, Concepción y Santa Catalina.

Esta diferenciación espacial indica, a simple vista, la existencia de oscilaciones cíclicas en la posición relativa de cada barrio con referencia a los demás barrios. Así tenemos, por ejemplo, que si bien el barrio de la Concepción, habitado por libertos y miembros de las castas,<sup>895</sup> fue en el período previo a las Reformas Borbónicas (1760-78), el que más bajo se cotizara (\$25), por debajo del de Retiro, en las décadas posteriores a las Reformas Borbónicas (1783-90), el barrio de la Concepción se cotizó superando al de

Retiro. En forma similar, si bien el barrio de San Juan, también habitado por libertos y artesanos, se cotizó en el periodo previo al Reglamento del Libre Cambio por debajo de los barrios Recio y San Nicolás, poblados generalmente por comerciantes y hacendados ausentistas, en las décadas siguientes a la equiparación de Buenos Aires a los demás puertos americanos (1783-90), el barrio de San Juan igualó su jerarquía mercantil con la de los barrios Recio y San Nicolás.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores más tradicionales.

## Capítulo I-D-13

### **Mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario (siglo XVIII).\***

#### Índice

- M-I Mercado inmueble rural de Buenos Aires
- M-II Subasta de tierras jesuíticas
- M-III. Conexión militar
- M-IV Cría y tráfico de ganado mular
- M-V Régimen del derecho de abolengo.
- M-VI Pequeña propiedad rural
- M-VII Movilidad y persistencia en la propiedad rural
- M-VIII Herencia y loteo como mecanismos de fragmentación

## **Introducción del capítulo I-D-13**

Admitida la inevitable movilidad social existente en la vida urbana y mercantil,<sup>896</sup> ciertos autores han insistido últimamente,<sup>897</sup> refiriéndose al Alto Perú, Chile, Perú y México pre-revolucionarios, que también en el agro latinoamericano se había dado en tiempos coloniales una considerable movilidad social. Béaur (1989), refiriéndose a la Francia revolucionaria, sostuvo que si bien la venta de los llamados bienes nacionales, equivalente a nuestras Temporalidades (bienes de los Jesuitas expulsos), le dieron un envión al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico superior, el fenómeno de la redistribución de la tierra no puede ser comprensible si no se tiene en cuenta el dinamismo de los mercados inmobiliarios tradicionales.<sup>898</sup> A diferencia de Lefebvre (1963), quien sostuvo que el despegue de la pequeña propiedad, la preservación de los bienes comunales y la defensa de los derechos de uso fueron frenos a la penetración del capitalismo en la campaña, Soboul (1977) ha sostenido la tesis de la vía campesina del desarrollo del capitalismo agrario. Últimamente Lehmann (1985) y Clère (1988) concluyeron que el origen y desarrollo del capitalismo no está reñido con la consolidación de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños productores.<sup>899</sup> Por mi

parte, intenté probar que en el Río de la Plata, pese a la existencia de restricciones extra-económicas --producto del derecho de abolengo, como el tanteo,<sup>900</sup> y el retracto,<sup>901</sup> y del régimen capellánico, propios del Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de chacras y estancias sufrió un intenso proceso de fragmentación, y con ella las derivaciones y desarticulaciones sociales y políticas consiguientes.<sup>902</sup> Los mecanismos restrictivos de circulación de la tierra también le garantizaban al estado colonial mercantilista la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>903</sup>

Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, mientras numerosos autores (Sebill, 1989; Presta, 1989; Jackson, 1988; Jackson y Gordillo, 1993; Cornejo, 1945; Mata de López, 1989,1990; Yofre, 1904; Maeder, 1981; Calvo, 1993; y Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 1968), refiriéndose a La Paz, Tarija, Cochabamba, Salta, Córdoba, Corrientes, Santa Fé y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; otros autores como López Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1993), Mayo y Latrubese (1993), Gelman (1992) y Garavaglia (1987,1993), refiriéndose a la región Bonaerense alejada de la frontera, nos informan que en ella existieron una gran cantidad de vecinos que eran terratenientes, pero pequeños propietarios. Para el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (1989), reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, le admiten cierta tendencia al aumento de sus dimensiones.<sup>904</sup> En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989), y Halperín Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la agricultura fué más relevante que la ganadería, Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

En ese mismo sentido, la distribución de tierras rurales en las regiones de frontera de las pampas Argentinas había dado origen a un debate que subsiste hoy día.<sup>905</sup> A comienzos de siglo, Coni (1920,1927) enfatizó la influencia que la propiedad privada --y consecuentemente el mercado inmobiliario rural-- tuvo en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en las tierras de pastoreo.<sup>906</sup> Más luego, Oddone (1930), González (1957), y últimamente Sábato (1989), remarcaron el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la inicial distribución de la tierra pública, la misma que había dado lugar a la formación de la llamada por algunos burguesía criolla y por otros oligarquía Argentina. En ese sentido, para Pastore (1991) --a la luz de las teorías de Baysinger (1981)-- los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>907</sup> Siguiendo estos argumentos, la escasez de tierra rural habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),<sup>908</sup> y el régimen capellánico,<sup>909</sup> a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de las unidades productivas. En este trabajo, trato de aprovechar ambas perspectivas, con el fin de estudiar la estructura social colonial, analizando el volumen y la intensidad del mercado y la subdivisión de tierras en la campaña de la provincia de Buenos Aires, durante el siglo XVIII.

En la perspectiva apuntada por Coni, la tradición historiográfica liberal advirtió que en el Buenos Aires del siglo XVIII, como consecuencia del desarrollo del mercado inmobiliario rural y la presencia del capital comercial, había nacido una contradicción entre terratenientes y comerciantes, que desestabilizaría la estructura social colonial. Esta

contradicción habría sido asimismo heredera de la antigua contradicción estamental entre encomenderos y mercaderes.<sup>910</sup> Esta tesis no prosperó, por cuanto Balmori y Oppenheimer (1979) descubrieron que los primeros no habrían sido otra cosa que un grupo subalterno de los segundos. La presencia del mercader-estanciero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades, es la que habría amortiguado dicha contradicción, sin por ello haber logrado la estabilidad de la estructura social.<sup>911</sup> La burguesía comercial local habría buscado en el grupo subalterno de los terratenientes, grandes o pequeños, apoyo contra la gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada del capital minero, a fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la información de diversos procesos judiciales, de padrones de época, de actas capitulares, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de escrituras de compraventa, cesión, donación, dote y trueque, todas ellas depositadas en el fondo notarial existente en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>912</sup> así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>913</sup>

## **M-I Mercado inmueble rural de Buenos Aires**

La inversión en bienes inmuebles rurales (chacras y estancias) en tiempos coloniales revelaría, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles urbanos, la crónica inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo frecuente de la movilidad social ascendente y descendente vigente en ese entonces y la amplitud geográfica de su mercado. Durante el siglo XVIII el mercado inmobiliario rural (MIR) del litoral del Río de la Plata se mantuvo con algunos altibajos en una tónica por demás modesta. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 222 operaciones notariales, sobre chacras y estancias,<sup>914</sup> en Buenos Aires, en igual período se registraron más del triple (713 operaciones), y desde 1701 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 1.684 operaciones notariales sobre chacras y estancias. El Gráfico C-I, fundado en la Tabla D-I, nos revela las fluctuaciones del MIR de Buenos Aires.<sup>915</sup> En ocasión de la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1721), el número de operaciones inmobiliarias se incrementó de 10 en 1720, por valor de \$4.325, y correspondientes a 23.750 varas lineales, a 21 por valor de \$49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas lineales. Y en ocasión de la participación de España en la Guerra de la Revolución Americana (1781) el valor de las operaciones se sextuplicaron de un total de 18 operaciones por valor de \$5.862 en 1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a 20 operaciones por valor de \$29.915 en 1781, correspondientes a 23.641 varas lineales. Pero a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX el mercado creció de un total de 22 operaciones por valor de \$26.494, correspondientes a 16 mil varas lineales, en ocasión de iniciarse las Guerras de la Revolución Francesa (1790), a un total de 24 operaciones por valor de \$40.353 en 1802, correspondientes a 47.157 varas lineales; y de 9 operaciones por valor de \$6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor de \$144.554, en 1808.<sup>916</sup>

Amén del estudio del mercado inmobiliario rural es preciso también estudiar la rotación o cambio de dueño sufrida por cada predio en forma individual en un determinado período de tiempo. Borde y Góngora (1956) en su estudio del Valle de Puangue, en Chile, concluyeron que las 15 haciendas bajo la lupa de su investigación fueron vendidas en el período colonial unas 44 veces.<sup>917</sup> Taylor (1972), fundado en la elaboración propia de un catastro rural del Valle de Oaxaca, en México, descubrió que las haciendas del siglo XVIII

cambiaron de dueño un promedio de veces mayor que en Chile, cinco veces en lo que fue del siglo.<sup>918</sup> Ramírez (1991) estableció que en Lambayeque, costa norte del Perú, el 62% de las haciendas habían sido adquiridas por compraventa y sólo el 22% por herencia. Y Brading (1973), en su estudio de León, también en México, descubrió una rotación algo menor, pues alcanzó a sólo cuatro veces en un período mucho mayor, 1700-1860.<sup>919</sup> De ahí que Van Young (1983) concluya, a diferencia de Grosso (1992) en su estudio sobre Tepeaca, que el alto grado de inestabilidad dominial fuera más la regla que la excepción.<sup>920</sup> En forma semejante a como concluyera Van Young, debido a un factor de sesgo estructural, uno podría permitirse entonces dudar de la representatividad de los análisis sincrónicos, tales como los practicados por Halperín Donghi (1975), Salvatore y Brown (1987), Gelman (1989), y Birocco (1992a).

Para lograr el ascenso social en el Río de la Plata se ensayaron entonces distintas estrategias. Aquellos que no deseaban seguir una carrera mercantil terminaban invirtiendo sus capitales en predios rurales agrícolas (chacras) o ganaderos (estancias). El pasaje de una categoría de comisionistas o habilitados del comercio o de arrendatarios del agro, a otra de dueños de chacra o estancia se sucedía de una forma ininterrumpida en el espacio colonial Rioplatense. Los futuros hacendados, primero acumulaban habilidad, ya sea en el comercio como mozos, mancebos, dependientes o habilitados, o en el agro como arrendatarios, para luego invertir sus ahorros en la adquisición de tierras.<sup>921</sup> Personalmente participo de la posición de Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y de Gresores y Martínez Dougnac (1992), que sostienen la preeminencia de la ganadería sobre la agricultura en la campaña bonaerense del siglo XVIII, pues los hacendados por lo general se rehusaban a pagar el diezmo de cuatropea. Este diezmo ofrecía mayores problemas para su cobro que el diezmo de granos, según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y además caer en tiempo oportuno ya que, habitualmente, los hacendados encontraban siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las epidemias, los cardos, o las pariciones. El diezmero Juan Martín Dupon se presenta y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".<sup>922</sup> El juez Don José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro [Banda Oriental], éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante."<sup>923</sup>

El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho tributo. En el caso de Santa Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y que al año siguiente, los réditos de aquel principal con el producto del noveno y medio, se pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un fondo considerable, para la fundación del Hospital".<sup>924</sup>

Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no

exigieron al cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una cantidad considerable".<sup>925</sup> Pero nombrados como Procuradores Generales José Ignacio Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez después, se empezó al menos a indagar el monto de lo adeudado por los principales contribuyentes del Ramo, entre ellos el Teniente Gobernador de Santa Fé Melchor de Echagüe y Gaete,<sup>926</sup> dueño de estancias en la Costa del Añapiré, actual Entre Ríos, quien debía más de \$3.000 al Ramo.<sup>927</sup> Sin embargo, al ver los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían contrastar, tuvieron poder para conseguir la revocación [del Auto], con lo que cesó la persecución [de los recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".<sup>928</sup> Si bien antes y después ha habido Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores, como en el día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus enfermedades".<sup>929</sup>

Una prolongada transición entre la encomienda y la hacienda fue avizorada por diversos autores. En Jujuy, Rutledge (1987) y Madrazo (1990), refiriéndose al Marquesado de Tojo, y siguiendo las huellas de Burga (1976), alcanzaron a entrever una transición entre la encomienda y la hacienda.<sup>930</sup> Las enormes invernadas de mulas practicadas en las haciendas del Totoral, ubicadas en la Quebrada de Humahuaca, sólo las podían emprender los grandes comerciantes y hacendados. Ello era así porque su extracción para las provincias del Perú

"...se hace imposible en no llevando plata sellada y géneros con que poder haviar los capataces y peones que las an de conducir y arrear y para pagar el derecho de la sisa en la Real Caxa de Jujuy",<sup>931</sup>

porque para su conducción necesitaban "...de comprar otras mulas mansas que sirven de madrinas a las chúcaras para que no disparen, las cuales se compran a los vecinos de Salta y Jujuy con dinero y mercancías de contado",<sup>932</sup> y porque "...es necesario poner para el reparo soldados con boca de fuego porque los bárbaros no hagan hostilidades y roben la hacienda".<sup>933</sup>

## **M-II Subasta de Tierras Jesuíticas**

También ensayaron los terratenientes su influencia en el poder político. Ya a mediados del siglo XVIII, un numeroso grupo de estancieros criollos se coaligó estrechamente con vecinos comerciantes, detrás del Comandante de la primera Expedición Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de Valdelirios,<sup>934</sup> y del Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa.<sup>935</sup> Y cuando en 1767 la monarquía Borbónica expulsó a los Jesuitas de toda América, las Juntas Municipales de Temporalidades, instaladas en cada ciudad de provincia, y que contaban con representantes de los cabildos seculares y eclesiásticos, fueron las encargadas de subastar las valiosas tierras que aquellos poseyeron, vendiéndolas en grandes dimensiones a particulares estrechamente vinculados con las autoridades locales.<sup>936</sup> Sin embargo, algunas jurisdicciones se salvaron del atropello. En Tarija, cuando los Franciscanos suplicaron a la Corona que pusiese un Administrador en la estancia y demás tierras de la Misión de las Salinas y que a los Misioneros se les dejase la casa, Iglesia, y una huertecilla contigua, para que sólo se ocupasen de lo espiritual, corriendo el Administrador con lo temporal, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Tomás Álvarez de Acevedo se negó respondiendo

"...que prosiguieran los Misioneros en el cuidado de lo temporal de la Misión pues de lo contrario sucedería lo que en otras Misiones, que fueron de Jesuitas, las que estaban perdidas, y asoladas por causa de los Administradores, y por la codicia de los Doctrineros".<sup>937</sup>

Gran parte de las grandes unidades de producción rural, pertenecientes a la Compañía de Jesús, fueron subastadas al mejor postor. En Salta, una vez producida la expulsión, las tierras de la Compañía de Jesús fueron subastadas. El Comandante de Armas Coronel Antonio de Figueroa,<sup>938</sup> adquirió a las Temporalidades en 1786 la hacienda El Bañado, ubicada en el Valle de Lerma;<sup>939</sup> Pedro Castellanos Zerda,<sup>940</sup> las estancias La Cámara, La Hoyada y Barraza;<sup>941</sup> Agustín Erquicia la hacienda La Isla;<sup>942</sup> Francisco Manuel Costas,<sup>943</sup> en 1795 las estancias Despensa, Porongos y Mosquera;<sup>944</sup> y Mateo de Saravia y Jáuregui la estancia El Carmen en los confines con Santiago del Estero.<sup>945</sup> Y en Tucumán, gran parte de la elite capitular, cuya base económica fundamental era el comercio a larga distancia entre Buenos Aires y el Alto Perú, participó de los despojos de los esclavos y las tierras de los Jesuitas, próximas éstas a los centros urbanos.<sup>946</sup> En un principio, lo que estaba en juego era la extensión de los arrendamientos. En una larga misiva firmada por Vicente Escobar,<sup>947</sup> Francisco Javier Sánchez de la Madrid,<sup>948</sup> Francisco Texerina,<sup>949</sup> Gabriel Rubert,<sup>950</sup> y Gerónimo Romano,<sup>951</sup> le aclaran al Presidente de la Superior Junta Provincial de Temporalidades del Tucumán, a fines de 1771, que a excepción de la hacienda de Los Lules, que tiene dos paradas de molinos y curtiduría, y otros beneficios, como el de estar cercana a la ciudad, y la hacienda de Vipos, por tener una corta viña, y ser de pan llevar,

"...todas las demás haciendas son tierras sin beneficio, sólo Tafi, San Xavier, y Raco ocupan ganados, y sea en cualquiera de ellas es preciso que el arrendador entre haciendo costo en muchos menesteres precisos y urgentes, que no se los podrán reponer en un año, ni dos sino se les concede por más tiempo el arrendamiento".<sup>952</sup>

Dos años después, en diciembre de 1773, Luis de Aguilar le adelantaba al nuevo Presidente de la Junta Provincial Fermín Ruiz Poyo,<sup>953</sup> el perjuicio que acarrearía a las haciendas "...la anticipada enajenación del ganado manso que había en el rincón", pues la destrucción de éste "...imposibilitaría el recojo del ganado alzado".<sup>954</sup> Un año más tarde, en 1774, habiéndose reducido los ingresos por arrendamientos se resolvió enajenar dichas tierras. En ese sentido vemos como Julián Ruiz de Huidobro,<sup>955</sup> quien entre 1767 y 1773 contrajo en Buenos Aires una decena de operaciones de fiado por valor de \$22.606,<sup>956</sup> adquiere en el Valle del Tafi, en 1774, la estancia "El Rincón" (6 leguas cuadradas); Juan Antonio Aráoz,<sup>957</sup> la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros; Francisco Javier Sánchez de la Madrid, quien había concertado en 1773 en Buenos Aires una sola operación por valor de \$9.246,<sup>958</sup> adquiere el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas cuadradas); y Juan García Cárdenas,<sup>959</sup> quien entre 1768 y 1774 contrajo en Buenos Aires ocho operaciones de fiado por valor de \$18.204,<sup>960</sup> adquiere en 1774, entre Lules y Famaillá, el Potrero de San Jenuario y la suerte de Los Cardones de 1 1/2 legua cuadrada, uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tafi.<sup>961</sup> Asimismo, Juan López Ríos,<sup>962</sup> adquiere el Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,<sup>963</sup> el Potrero Raco, en Trancas; y Fermín de Paz,<sup>964</sup> los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.<sup>965</sup> En las declaraciones y diligencias reservadas que en 1780 hizo Francisco José Marcano y Arizmendi, un cura apóstata, también se denunció que las demás tierras de los Jesuitas "...dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo, y del Vicario".<sup>966</sup> Tal fue la repartija que Marcano exclamaba

"...el Alcalde Provincial, [Fermín] Poyo, [José Antonio] Molina, Juan García [Cárdenas], José Thames, Julián Ruiz [Huidobro], los Arauses, [José Antonio] Elguero, José Ojeda, Francisca Xaviera Ramírez [mujer de Salvador Díaz de la Peña], el Comendador de la Merced Fr. Policarpo, los Villafañes (menos Don Xavier, todos son de una [misma] casa, y también Don Pedro Antonio Araus".<sup>967</sup>

Sin embargo, Rosenzvaig (1987), fundado en la riquísima información que brinda Schleh (1955), acerca de los orígenes del Departamento de Cruz Alta, nos informa que el proceso de fragmentación territorial, en que se inició el campo tucumano a fines del siglo XVIII, se va acentuando progresivamente hasta alcanzar en vísperas de la formación del ingenio moderno, en el último tercio del siglo XIX, un verdadero minifundio y un punto de inflexión.<sup>968</sup> También en Catamarca, a juzgar por la información que brinda Guzmán (1985), el Valle de San Fernando se vio pronunciadamente fragmentado. Pero si bien predominaba en ella la pequeña propiedad, la estancia "Guazán", se caracterizó por su gran extensión y por el mayorazgo que llevaba consigo, fuente de larguísimos pleitos.<sup>969</sup> Asimismo en La Rioja, Castilla y Sod (1990) y Castilla y Adams (1990), en unos estudios sobre el origen del albinismo en Aicuña, probaron la íntima conexión que se dio entre la consanguinidad y la distribución de la tierra.

También en Córdoba, la gran propiedad afectó gran parte de la gobernación-Intendencia. Yofre (1904) y Barrionuevo Imposti (1949) nos informan de la distribución de la tierra en Río Cuarto y Traslasierra, respectivamente. En aquellos pedanías donde los Jesuitas poseyeron grandes estancias, sus tierras fueron subastadas al mejor postor por las Temporalidades. Francisco Antonio Díaz adquirió de las Temporalidades la estancia de Santa Catalina,<sup>970</sup> José Rodríguez la estancia de Alta Gracia,<sup>971</sup> José Antonio Ortiz la estancia San Ignacio en Calamuchita,<sup>972</sup> Félix Correa la estancia de Jesús María,<sup>973</sup> y Francisco Pérez Salcedo,<sup>974</sup> y José de Isasa y Ayesta, la estancia de La Candelaria, en Cruz del Eje.<sup>975</sup> Las Temporalidades también afectaron las finanzas de la Universidad y especialmente las del Colegio de Monserrat.<sup>976</sup>

No sólo las enormes extensiones de tierras de las Temporalidades fueron subastadas en grandes dimensiones entre los miembros de las elites próximas a los Cabildos de todas las ciudades, sino también aquellas otras tierras que siendo realengas se hallaban próximas a centros urbanos.<sup>977</sup> En Buenos Aires, por ejemplo, se comercializaron no solo las tierras de la banda occidental del Río de la Plata, sino gran parte de las tierras de la Banda Oriental. Sala, Rodríguez y De la Torre (1967) señalaron que una fuerza política importante la constituían en Montevideo los hacendados del litoral de origen bonaerense como Cerro Sáenz, Milá de la Roca, Azcuénaga, Escalada, etc.<sup>978</sup> En 1772, los apoderados de Santo Domingo Soriano, un pueblo de indios, protestaban porque el porteño Julián de Gregorio de Espinosa,<sup>979</sup> había establecido faenas de cueros en las zonas de salida de sus ganados y dificultaba los cortes de leña.<sup>980</sup> Un año antes, en 1771, el Cabildo de Montevideo había hecho oposición a las denuncias de tierras del Registrero Francisco de Alzáybar, alegando que por pertenecer las mismas a su jurisdicción debían quedar reservadas a su vecindario.<sup>981</sup> Y treinta años después, en 1802, el pueblo de las Víboras se debatía contra las pretensiones del terrateniente y Administrador de la Real Renta de Correos Melchor de Albín,<sup>982</sup> los vecinos de San José contra los herederos de Miguel I. de la Quadra y Mateo Gallego; los de Cerro Largo contra la casa Viana-Achucarro; los de Porongos contra los Quadra-Durán; y los de la región entre el Yí y el Negro contra Feliciano Correa, etc.<sup>983</sup> Para el Paraguay, Aguirre (1948-51) relata la influencia de las

grandes estancias en la colonización.<sup>984</sup> Como encomenderos, los vecinos de Asunción se habían repartido la mayor parte de las tierras cultivables. La región del Tebiquarí, Quyuquyó e Itauguá era del dominio de los Yegros y Ledesma, la de las Cordilleras de los Cabañas y Ampuero, la de Paraguari y Carapeguá de los Bareiro, la de Pilar de Ñeembucú de los Rojas de Aranda, la de Misiones de los Rivarola y los Bogarín, la del Valle de Barsequillo de los Cañete y Domínguez, la del Río Tobatí y el Río Salado de los Larios Galván, la de Tapúa de los Casal y Sanabria y los León y Zárate, la de Concepción de los Espínola y Peña, y la de Ycuamandyjú de los Lacoizqueta.<sup>985</sup> Aguirre destaca que en la estancia de Carandaipirú, probablemente ubicada en el Cerro de Aparipí,<sup>986</sup> la familia Recalde poseía "...Pacobal y Piñal, grandes cañaverales, huerta, buenas casas y oratorio, y aguadas permanentes, unas artificiales y otras naturales".<sup>987</sup> Para Corrientes, Maeder (1981,1992) nos provee la cantidad de ventas de chacras y estancias efectuadas entre 1771 y 1809.<sup>988</sup> Asimismo, nos ofrece la nómina de los beneficiarios de tierras realengas y el estudio de un caso.<sup>989</sup> En Curuzú Cuatiá, Francisco Benigno Martínez alegaba en 1799 en su reclamo por un sacerdote que oficiara misa, que

"...aunque allí existan muchas estancias, y crecido número de haciendas, los dueños habitan en la Ciudad, y algunos en esta Capilla [de San Roque], sin que en aquellas recidan otros que los capataces y peones, gente toda miserable, que no puede sufragar a la congrua de un sacerdote, ya por la citada indigencia; y ya por que las estancias se hallan dispersas por necesidad, hallándose por esto en distancia de 20 o más leguas sólo siete u ocho estancias de consideración".<sup>990</sup>

En la Villa de Gualeguaychú, su Cabildo querelló en 1784 al terrateniente Justo Estéban García de Zúñiga,<sup>991</sup> quien poseyendo la estancia Campos Floridos, que iba desde el Gualeguay al Gualeguaychú, se resistía a parar los rodeos que pedían los vecinos.<sup>992</sup> Un año más tarde, en 1785, el mismo Cabildo de Gualeguaychú, liderado por Tomás de Rocamora,<sup>993</sup> se oponía a que una estancia, que se extendía hasta cerca de una legua de Gualeguaychú, fuera entregada al terrateniente Juan Carlos Wright, alegando para ello que el campo era realengo, y que las principales poblaciones de Entre Ríos estaban cercadas por terratenientes.<sup>994</sup> Asimismo, en Nogoyá, la corriente inmigratoria que afluyó desde la Ensenada hacia el este fue menos importante que la corriente del Norte, debido a los obstáculos que le pusieron a su poblamiento el hacendado Francisco J. Crespo,<sup>995</sup> y el Administrador de los Pueblos de Indios de Santa Fé José Teodoro Larraamendi,<sup>996</sup> quienes habían logrado del Cabildo de dicha ciudad el reconocimiento de sus derechos a una gran extensión de tierras en esa región.<sup>997</sup>

### **M-III Conexión Militar**

Los propietarios de los grandes predios se caracterizaban por detentar en el siglo XVIII simultáneamente la Comandancia de los Fuertes próximos a sus propiedades.<sup>998</sup> En la zona de frontera con el Chaco Salteño, el Comandante del Fuerte de Nuestra Señora de Rosario de Ledesma,<sup>999</sup> Diego José de Pueyrredón,<sup>1000</sup> era en 1802 "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernarse, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".<sup>1001</sup> A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,<sup>1002</sup> proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su comando".<sup>1003</sup> Más aún, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".<sup>1004</sup>

Asimismo, las tierras del Fuerte de San Fernando del Río del Valle,<sup>1005</sup> eran poseídas por su Comandante Juan José Cornejo,<sup>1006</sup> quien era dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dio a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. [José] Medeyros".<sup>1007</sup>

Recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".<sup>1008</sup> Con el servicio de los soldados, Presidarios e Indios infieles, Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".<sup>1009</sup> Fué precisamente en este lugar donde a fines del siglo XVIII, y muy probablemente provocada por las prácticas del Comandante Cornejo, se desencadenó una de las más sangrientas y prolongadas rebeliones indígenas. Por el contrario, cuando un Comandante de Armas perdía el mando de su guarnición por lo general también perdía la propiedad de sus estancias. En Tarija, en 1782, en los cargos que el Cabildo levantara contra el Comandante de Armas Luis Hurtado de Mendoza,<sup>1010</sup> por su desempeño en la Expedición contra los indios Chiriguano, un testigo declaraba que

"...es cierto que por despojar al Sr. Comandante del empleo de Coronel y mando militar a experimentado las persecuciones que a padecido en años pasados de suerte que se ha quedado sin las estancias de los Toldos y Baritu que poseía antes y le remataron sus ganados y demás muebles, asta que lo an puesto en precisión de hacer dimisión de las casas que poseía por no poder contribuir al senso que cargan al Convento de San Agustín desta Villa".<sup>1011</sup>

Si bien en la Banda Oriental también existió la pequeña propiedad,<sup>1012</sup> la mayor parte de su territorio se caracterizaba fundamentalmente por dar lugar a la cría extensiva y la recolección de ganado vacuno.<sup>1013</sup> Según Brito Stifano (1953), cuanto "...mayor es la estancia más [ganado] coge; y mientras menos gente, y menos ganado manso hay en ella, más entra del cimarrón".<sup>1014</sup> Tan era así, que por la apropiación de este ganado orejano se libraban verdaderas guerras, entre las peonadas de diversos hacendados. Aún diez años después de producida la Revolución, en 1823, Juan Miguens, segundo marido de Rita Balderas, viuda de Juan Noario, libraba con Agustín Lastra y otros hacendados escaramuzas armadas por la propiedad de los ganados de la Bahía de Samborombón.<sup>1015</sup>

#### **M-IV Cría y tráfico de ganado mular**

Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires, las rinconadas que formaban las desembocaduras de los ríos Conchas, Luján, Areco, y Arrecifes, y el Arroyo del Medio, con el río Paraná, y las estancias que bordeaban el río Matanzas, se caracterizaron siempre por la cría de ganado mular.<sup>1016</sup> El debilitamiento de los lazos con la metrópoli española durante la guerra de Sucesión de España (1700-1713) obligó a los comerciantes-hacendados porteños a buscar un sustituto al comercio con mercadería importada. Si bien ya era tradicional durante el siglo XVII el comercio de mulas y hacienda en pie al Alto Perú, a comienzos del siglo XVIII creció un 26% respecto del período anterior.<sup>1017</sup> En

efecto, según la Tabla D-II, los hacendados exportaron al Alto Perú 63.186 vacunos por valor de \$94.779 y 36.381 mulares por \$145.524.<sup>1018</sup> En 1714, al tiempo de sustanciarse el embargo de la sucesión de Don Miguel de Riglos, existían en sus cuatro estancias del llamado Rincón de Riglos, en la desembocadura del río Areco, un centenar y medio de burros hechores y miles de yeguas cimarronas.<sup>1019</sup> Francisco de Suero, Defensor judicial de los bienes de Miguel de Riglos, afirmaba en 1728, en su crítica a la administración de las tierras embargadas, llevada durante catorce años por Don Pedro de Saavedra, que "...no hubo en dichas estancias la aplicación y asistencias necesarias para tener sujetas las crías, retovar y amamantar burros y domar potros".<sup>1020</sup> Con que no solo se siguió de lo dicho un gran menoscabo "...sino el no haberse aumentado dichas crías así de mulas como de yeguas y potros".<sup>1021</sup> A juicio de Suero, el aumento del ganado mular no se podía dar sin los burros hechores correspondientes, que "...si se han de retobar y amamantar aora es necesario passen mas de tres años para que sea provechosa esta disposición".<sup>1022</sup> Con que al entender de Suero era mejor

"...comprar hasta ciento de ellos [burros] que me dicen balen a seis pesos poco mas o menos solicitándolos dicho administrador de mano de persona que no lo engañe con burros que no sean apartados de manadas de cría con la esperanza de que en los años que habían de tardar en criarse otros de nuevo se reintegre este gasto del aumento que producirán de mulas".<sup>1023</sup>

No obstante la compra de burros, Suero aconsejaba que no se omitiera "...el amamantar y criar con todo cuidado en cada una de las cuatro estancias a lo menos 25 burros al año y domar todos los Potros y novillos que sea posible".<sup>1024</sup> Y a comienzos de la década del 50 el Cabildo de Buenos Aires otorgaba a José Antonio Ortiz, a Santos Pérez, a Antonio Figueroa y a Francisco Pinto Villalobos, diversas concesiones para exportar gran cantidad de mulas a Córdoba, Salta y los dominios de Portugal.<sup>1025</sup>

El control por la distribución del agua de riego fue en algunas regiones el origen de la gran propiedad rural. En Cuyo, el Noroeste y el mundo andino en general, la gran propiedad se garantizaba mediante el control de la distribución del agua.<sup>1026</sup> El caso más relevante de monopolización del agua que se conoce ocurrió en Catamarca y tuvo por protagonista al Pbro. Pedro Ignacio de Arce, quien sustraía las aguas al pueblo de indios de Choya.<sup>1027</sup> En Mendoza, las tierras de las Temporalidades fueron arrendadas a numerosos vecinos miembros del Cabildo.<sup>1028</sup> Pero posteriormente, algunas de dichas tierras fueron subastadas al mejor postor.<sup>1029</sup> En Buenos Aires, en el mismo sentido apuntado por Balmori, la Tabla D-III, que aquí producimos, nos ilustra la nómina de mercaderes estancieros que se dieron a lo largo del siglo XVIII, quienes se caracterizaban por la gran propiedad.

## **M-V Régimen del derecho de abolengo.**

Otras formas de garantizar la gran propiedad, que finalmente en Buenos Aires resultaron infructuosas, la ofrecían el régimen del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo y el retracto, y el régimen capellánico. Por medio del tanteo y del retracto, cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia, ya oportunamente tratadas por Weber, y que también se dieron en el mundo anglosajón,<sup>1030</sup> el estamento patricio o nobiliario sustraía del mercado tierras, casas y solares.<sup>1031</sup> Este derecho, típicamente feudal, tuvo mayor predicamento en el interior del espacio colonial. En efecto, se practicó sobre una chacra en Montevideo, sobre los Potreros de Zapata y Chilcas y la

estancia del Rodeo Grande, en Ambato, Catamarca; sobre la estancia la Pampa Grande en Salta; y sobre casas, solares y estancias en Córdoba.<sup>1032</sup> En Catamarca, el Pbro. Pedro Ignacio de Arze demandó a Domingo Carrizo, a su yerno Mauricio Rivero, y a Ramón Ramírez de Arellano, vecinos de Copacabana, la validación de la compra del Potrero de Zapata que hiciera a su prima Flora Carrizo y su consorte Domingo Núñez.<sup>1033</sup> En Salta, Andrés José de Acosta, a nombre de Pedro Arias Rengel, alegó en su litigio --celebrado en 1806-- con Pedro Pablo Arias Velásquez, sobre el derecho de retracto a la estancia de la Pampa Grande, que se vendió en pública almoneda para el pago de deudas fiscales, que cuando son muchos los retrayentes en igual grado y privilegio y es imposible la comunal posesión porque produciría en vez de frutos discordias;

"...es claro que debe concederse a los que son hombres, a los que son hijos y en caso de preferencia ceteris paribus, no sería conforme a los objetos del derecho concederla a una sola hija de Francisco Borja Arias, y negarla a tres hijos juntos, concederla a una mujer y negarla a los varones, concederla a la menor y negarla a los mayores, concederla a la que ni aún conoce la finca apetecida por que la apetece su marido, y negarla a los que la han cultivado y trabajado desde sus primeros años".<sup>1034</sup>

Y el Dr. José Antonio Arias Hidalgo, en nombre de José Gabriel, Nepomuceno y Pedro Arias Rengel, hermanos legítimos e hijos de los finados Francisco Borja Arias Rengel y Petrona Castellanos, alegaba que Pedro Pablo Arias Velásquez

"...no es de la sangre ni descende del mismo tronco que nosotros, y por que cuando contase con el mismo origen, tenemos a nuestro favor cuantos apoyos se necesitan, para el logro de la preferencia que apetecemos pues somos varones, que constituimos la línea de agnación, preferente para las Leyes: estamos en quasi posesión y somos los mayores en edad con opción declarada en la materia".<sup>1035</sup>

El caso de retracto ocurrido en Montevideo, que iniciara Juan Martínez contra Nicolás Zamora, por la chacra que le vendiera Luis de Chávez, fue por el derecho de comunidad y/o vecindad y no por derecho de abolengo.<sup>1036</sup>

El régimen capellánico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la concentración de la propiedad rural. Bajando del Perú, de norte a sur, en el Cuzco, por el testamento que en 1760 otorgara Doña Juana de Oquendo y Enríquez, viuda consecutivamente del General Gaspar de Zedillo y de Manuel Vásquez Meléndez, consta que entre los numerosos legados que dejó gravados sobre el famoso obraje y haciendas de Pichuichuro,<sup>1037</sup> ubicados en la Doctrina de Suriti, y sobre la Hacienda de Guascarpampa, del distrito de Limatambo, provincia de Abancay, se hallaban afincadas once capellanías por valor de \$46.000, cuyos patronos y capellanes detalla con extrema minuciosidad, y a falta de estos los lega en el Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús.<sup>1038</sup> En La Paz, Alto Perú, se siguió en 1780 un dilatado pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.<sup>1039</sup> El patronato se fundó, entre otras numerosas propiedades, sobre la Hacienda nombrada Sapan, cita en el Valle de Carabillo, donde se impusieron \$3.195 al 3%; y sobre otra Hacienda cita en la Villa de Pisco, de \$2.000, a favor de las buenas memorias de

Dotes para remediar Doncellas, impuestas por el Alf. José Rodríguez Calero, y en nombre de Doña Lorenza de las Casas su mujer, que luego fuera de Juan Cabero.<sup>1040</sup> El Patronato de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.<sup>1041</sup> De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.<sup>1042</sup>

En Jujuy, Agustín Arismendi y sus herederos, litigaron contra Francisco Javier del Portal,<sup>1043</sup> acerca de la capellanía fundada en 1699 por el Maestro Juan Rodríguez Viera,<sup>1044</sup> sobre las tierras del Totoral.<sup>1045</sup> Mientras Arismendi, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Pérez de Saravia, insistía que las tierras del Totoral nunca formaron una unidad con las de San Juan, que sí estaban gravadas por dicha capellanía, y que entre estas y las tierras de Amuzátegui promediaban las de los Salcedo Poblete, Portal aseguraba, defendido por los Dres. Juan José Castelli y Miguel Villegas, que

"...el territorio de la capellanía o Potrero del Pongo señalado por fundo empieza desde las juntas que forman el un cauce o brazo del río de Perico con el de Humaguaca hasta la unión del otro brazo de aquel con el Siancas, que es el territorio llamado de San Juan que fué dado de Merced a el Capitán Pedro Godoy a fs.103 quad.2o. que pasó a ser de Amuzátegui por el compromiso de fs.95. Pero de ninguna manera consta que entre la ubicación del dicho territorio, y el de las tierras del Totoral deva mediar la dada de merced a el Sr. Salcedo: por que siendo cierto que la merced echa a Godoy abraza el territorio de San Juan con expresión de que tuviese ocho leguas de extensión se reconoce por los articulados de fs.128 a 142 que de las juntas de los ríos Humaguaca y Perico hasta las de ese con el de Siancas sobre que cae el Totoral, no hay tales ocho leguas de que se infiere que aquí no está comprendida la merced de Salcedo sino en la parte que viene del Serro de Zapla para dichas juntas primeras".<sup>1046</sup>

En Salta, en la fundación que impuso en 1769, por cláusula testamentaria, el albacea de Hernando Hervas, Pedro Díaz de Loria, sobre la estancia y potreros de la Alemania, litigaron entre sí el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y Hoyos, y Don Manuel Fernando Aramburú.<sup>1047</sup> La fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso a favor de su medio hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban de la Silleta e Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,<sup>1048</sup> fué litigada a comienzos del siglo XIX entre el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de Rosario de Lerma, Pbro. Isidro Fernández.<sup>1049</sup> En Tucumán, en la capellanía fundada en 1797 por Juan Bautista del Campo y Paz,<sup>1050</sup> fincada sobre la estancia de la Reducción, el Promotor Fiscal Eclesiástico creía que el motivo de la prelación del Maestro Francisco Texerina, sobrino del fundador, al patronato de la misma, "...es haber estado más próximo a recibir los sacros ordenes o haberlos recibido".<sup>1051</sup> Por el contrario, el Dr. Pedro Ignacio Acuña,<sup>1052</sup> letrado de los herederos de Micaela del Campo, llamados por la escritura de fundación a ser los

patronos de la misma, rebatía las razones del Promotor Fiscal aduciendo que esta prelación se habría dado "...cuando la capellanía que se disputa fuese sacerdotal, o el fundador exigiese en el llamado el presbiterado".<sup>1053</sup> En La Rioja, Pomer (1985) halló en un Informe del Marqués de Sobremonte, que las numerosas familias de la Villa de Guandacol se vieron precisadas a emigrar o a servir de colonos de las tierras de un Brizuela y Doria, por cuanto las mismas eran indivisibles debido a un vínculo de mayorazgo.<sup>1054</sup> En la gobernación de Córdoba, se registraron entre 1643 y 1884 un centenar de fundaciones, de las cuales 15 correspondieron a La Rioja, 5 a San Juan, 3 a Salta, 2 a Mendoza, 1 a Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, respectivamente, y el resto a Córdoba.<sup>1055</sup>

Del centenar de fundaciones registradas en la Tabla D-IV, correspondientes a la gobernación de Córdoba del Tucumán, 12 fueron impuestas sobre estancias, 3 sobre haciendas, 1 sobre chacras, 1 sobre quintas y fincas respectivamente, y la inmensa mayoría sobre casas y solares urbanos. En Santiago del Estero, se disputó en 1782 entre los hijos del General Juan José de Paz e Ibáñez del Castrillo y de María Antonia Salvatierra,<sup>1056</sup> albacea del tío político Dr. Juan Tomás López de Velazco, la Capellanía fundada sobre la estancia de Tenené.<sup>1057</sup> Y en 1800, Juan Gregorio Rizo Patrón, en representación del Maestro Casimiro Aguero, su cuñado, le disputó al Protector de Naturales, Nicolás de Ojeda, representante del pueblo de indios de Alijilán, las tierras de una capellanía que poseía el Cura de Soconcho (jurisdicción de Santiago del Estero), Maestro Felipe Hernández, quien las hubo por herencia de sus antepasados, quienes a su vez la habían adquirido del encomendero de dichos indios, Claudio Medina.<sup>1058</sup> En Catamarca, Pedro Lucas Herrera y Manuel Montero, herederos del Maestro Nicolás Herrera, dueño de la Hacienda del Portezuelo y fundador de la capellanía con que se hallaba gravada, y Andrés Aumada, censuario enfitéutico del Convento de Santo Domingo, litigaron en 1797 sobre los réditos adeudados procedentes de una capellanía de \$1.300 de principal y sobre la indivisibilidad de la hacienda.<sup>1059</sup> En La Rioja, en 1739, el cura de San Blas de los Sauces Manuel de Villafañe y Tejeda,<sup>1060</sup> compra a los herederos de Juan Gregorio Bazán de Pedraza la hacienda de Anillaco, lugar del pueblo de indios Tinogastas, con el gravámen capellánico incluido.<sup>1061</sup> A mediados del siglo XVIII, el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez,<sup>1062</sup> debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel Manuel de Castro,<sup>1063</sup> por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la Chacra Grande, en La Rioja.<sup>1064</sup> Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía "...a sus consanguíneos desde el primer grado hasta el último procediendo por todos grados y líneas hasta dar con el más ínfimo según la ley de sucesión".<sup>1065</sup> Sólo una vez extinguida su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad "...para que nombren Patronos ad libitum".<sup>1066</sup> Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a Castro para ser Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".<sup>1067</sup>

En Córdoba propiamente dicha, el Alcalde Provincial Domingo Garay,<sup>1068</sup> poseía por herencia paterna y materna, y por herencia de su suegra Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, tres haciendas de campo, una de ellas llamada de Ansacate y otra San Clemente.<sup>1069</sup> También tuvo un célebre litigio con su prima María Catalina de Tejeda, viuda de Luis de Aguirre y Dorado, acerca del derecho de propiedad de los Puestos de Minas, Quebrachos, y Chocaya, de la estancia de San José, que había heredado de su tío Pedro Garay, marido de Agueda Granados.<sup>1070</sup> A su vez, su madre Petronila Molina Navarrete, era dueña de la estancia llamada Nono, la cual se disputó judicialmente entre sus herederos Domingo y Fernando Garay, José de Ariza, Francisco Armesto, y Fernando de Arce y Bustillos.<sup>1071</sup> Finalmente, las tierras de la Estancia Nono, y

la de Guadalupe, con sus tres puestos denominados Minas, Chocaya y Quebrachos vinieron a quedar en propiedad de Domingo Garay.<sup>1072</sup> Con motivo de numerosos procesos que se le incoaron por numerosos crímenes cometidos contra la vida de diferentes personas se le embargaron los bienes, al extremo que su mujer, Isidora Zamudio, se vio obligada a pedir permiso para rifar su casa.<sup>1073</sup> En Santa Fé, Juan Bautista Iguen impuso en 1808 una capellanía a favor de Pedro José Crespo, hacendado con grandes extensiones en la actual Entre Ríos.<sup>1074</sup> En Buenos Aires, entre la clase agrícola-ganadera, se registró una docena de casos relevantes, destacándose Domingo de Acassuso, Gaspar de Bustamante, y María Verdún de Villaysán, en el pago de Monte Grande; Gerónimo de Avellaneda y Pablo y Antonio Barragán, en el pago de la Magdalena; los Alzáibar, en la Banda Oriental; Mariano Andrade, Jacinto Piñero y Juan de San Martín, en el pago de Arrecifes; Sebastián Delgado, en el pago de las Conchas; Gabriel de Alza y Juan Antonio Peña, en el pago de la Matanza; Teresa de Armaza y Arregui, viuda de Juan de Arozarena, en los pagos de Magdalena y Matanza; y Fermín de Pessoa, en el pago de Escobar. El hacendado Juan Ignacio de San Martín,<sup>1075</sup> dueño de estancias en el pago de los Arrecifes, primero fundó una capellanía en 1750 a favor de su hijo el Pbro. Carlos San Martín y luego otras dos en 1757 a favor de su hermano Fr. Pedro San Martín. Isabel Gámiz de las Cuevas, viuda de Francisco Ruiz Gómez, fundó primero en 1753 y 1761 sendas capellanías a favor del alma de sus dos hermanas mujeres,<sup>1076</sup> y luego en 1764 una capellanía a favor de su sobrino Juan Francisco Bolaños.<sup>1077</sup> Con respecto a la capellanía fundada por Antonio Barragán, el Dr. Miguel Antonio Escudero y Cossio,<sup>1078</sup> otorgó un poder en 1778 al comerciante y estanciero Felipe Arguibel para que se presentase ante el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires "...pidiendo que a mi nombre se les dé colación y canónica institución de la capellanía que fundó Antonio Barragán".<sup>1079</sup> Este último había fundado la capellanía sobre una estancia ubicada en Luján, que había sido de Juan Bautista Herrera de los Ríos y Lóyzaga.<sup>1080</sup> Pablo José de Eseyza, un poderoso hacendado del litoral, dejó en 1809 como congrua sustentación de un capellán, la increíble suma de \$400 anuales, equivalente a un principal de cuatro capellanías, o lo que era lo mismo \$8.000,

"...para que mis hijos criados y otros dependientes como los vecinos que están en el distrito de mi estancia nombrada la Pura y Limpia Concepción de Jacinta, jurisdicción de la Villa de San Antonio de Gualaguay, logren del beneficio de oír misa los días festivos en el oratorio que he conseguido poner en dicha mi estancia".<sup>1081</sup>

Asimismo, la imposición de censos y reconocimiento de censos contribuyeron a la indivisibilidad y a la alta rotación de la gran propiedad inmueble rural. En el caso de Buenos Aires, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos celebrados fueron practicados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real de las mismas. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 25 operaciones sobre bienes inmuebles rurales, los cuales se hallan incluidos en la Tabla D-V. Treinta y tres grandes hacendados y chacareros, productores de mulas para el Alto Perú, de cueros para Europa, y de granos para el mercado interno local, detallados en la Tabla D-V, formalizaron a lo largo del siglo XVIII 37 operaciones de censo, con instituciones eclesiásticas, por valor de \$42.480, sobre un total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole, por valor de \$1.094.332, es decir apenas el 4%. Entre los hacendados, los más asiduos usuarios del crédito eclesiástico fueron, según la Tabla D-V, Rafael Aguiar, dueño de una estancia en el pago de los Arroyos, quien contrajo en 1747 un censo por \$190; Felipe Arguibel y Juan Antonio Peña,

del pago de la Matanza, quienes contrajeron censos en 1764 y 1770 por valor de \$700 y \$4.840 respectivamente; Bernardo Muñoz de la Rosa, Clemente López Osornio, Juan Noario y Pedro Nolasco Escribano, vecinos del pago de la Magdalena, quienes contrajeron censos en 1728, 1742, 1757, y 1795 por valor de \$500, \$400, \$2.100 y \$2.000 respectivamente; Manuel Pinazo, de los pagos de Luján y las Conchas, quien contrajo un censo en 1753 por valor de \$225; José Gutiérrez de Paz, Antonio Rodríguez y Mariano Andrade, del pago de Arrecifes, quienes reconocieron y contrajeron censos en 1723 y 1796, por valor de \$1.000, \$2.350 y \$400 respectivamente; y el Dr. Pedro García de Zúñiga, con extensísimas tierras en la Banda Oriental, quien contrajo un censo en 1787 por valor de \$3.500.

## **M-VI Pequeña propiedad rural**

Pero la gran mayoría de los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales, debido al bajo valor de la tierra, no podían gravar sus campos con censos y capellanías, y a diferencia de los que acabamos de reseñar, no se caracterizaban por la gran propiedad ni por su alta rotación. De todas maneras, para poblar tierras con ganados era preciso tener tierras propias. Este requisito se remontaría al menos a 1759, quince años antes de lo señalado por González (1957) como inicio de la Junta General de Hacendados.<sup>1082</sup> En un documento recientemente hallado, Silverio de Melo,<sup>1083</sup> y Carlos Romero,<sup>1084</sup> declaran en 1759, confidencialmente, que en marzo de dicho año compraron a José Seliz o Celis 200 varas de tierra de estancia en Luján, a dos reales cada vara, pero que dicho instrumento de compra-venta obedeció a que

"...les mandaban salir del partido de Luján en donde están asentados por no tener tierras propias y para que no experimentasen perjuicio y extracción de sus haciendas en la mudanza que hiciesen dellas a otro territorio".<sup>1085</sup>

¿Quiénes podían mandarlos salir del partido sino una Junta de Hacendados fundada en un Bando semejante al de 1757?. Pero amén de las restricciones referidas a la propiedad y a su extensión mínima para ser considerado hacendado, con derecho a recoger hacienda realenga, los Lujanenses, en dicha época embarcados en un frustrado intento de autonomía regional, vieron limitado por las autoridades centrales el uso de los llamados bienes comunales.<sup>1086</sup> En 1751 los vecinos de Luján y la Cañada de Escobar denunciaron que los Padres Belermos o Betlemitas les impedían cortar leña, paja y estacas en la costa del río Paraná.<sup>1087</sup> Un año más tarde, los vecinos de Luján denuncian los perjuicios que se les origina al considerar tierras de pan llevar a las de la Cañada de Escobar.<sup>1088</sup> Tres años después, en 1755, los vecinos de Luján se quejaron de que Fermín de Pesoa, un fuerte hacendado de la zona, no los dejara cortar madera en los montes del río Paraná.<sup>1089</sup> Y seis años más tarde, en 1761, los vecinos del pago de la Costa de San Isidro se quejaban de las extorsiones a las que estaban siendo objeto, por el uso de sus canoas, por parte del Cabo de la Guardia de las Conchas José Robles.<sup>1090</sup> Con más detalle aún, en un documento recientemente hallado, se destaca que entre los pobladores de pueblos de frontera, que gozaron de suertes de tierras, otorgadas en merced u obtenidas en moderada composición, había diferentes clases, aquellos

"...que nunca las beneficiaron, otros que lo verificaron por algún tiempo; otros que en ellos hicieron algunas obras y plantíos pero después lo abandonaron, o dejaron sin continuar su cultivo ni reparo de lo hecho, otros que la tienen sin cultivo alguno, otros que sólo se lo dan a una parte quedando sin él, el restante terreno, y

otros que sólo sirve para darlo en arrendamiento o préstamos para hacer el uso que les acomode a quien lo recibe".<sup>1091</sup>

Tampoco los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales constituían una clase étnicamente homogénea. Había en el Río de la Plata, al igual que en el sur de los Estados Unidos, señalados por Schweninger (1989), propietarios grandes y pequeños; blancos, indios, mestizos y mulatos. Azcuay y Martínez Dougnac reconocen su existencia, aunque subestiman su relevancia.<sup>1092</sup> El pardo libre Lorenzo Juárez,<sup>1093</sup> vendió en 1709 al Cap. Cristóbal Escandón 300 varas de chacra en el pago de la Matanza.<sup>1094</sup> El pardo libre Antonio Márquez,<sup>1095</sup> compró en 1709 al Cap. Juan de San Martín 3.000 varas de estancia en Areco, y uno de sus trece hijos, llamado Santiago, de color pardo, declaró quince años después, en 1734, que vendía 500 varas en Areco al Gral. José Ruiz de Arellano.<sup>1096</sup> Las 2.500 varas restantes se presume las heredaron sus otros doce hijos. María de Campos, de color pardo, adquirió en 1735 a Julián Tamayo y Josefa Leguizamo 400 varas de tierra en Luján.<sup>1097</sup> El Alférez Pablo López,<sup>1098</sup> de color pardo, adquirió en 1705 al Teniente Fernando Monzón, en el pago de la Costa de San Isidro, una chacra de 350 varas de frente; y su hija Isabel López, mujer de Alonso Díaz, indudablemente parda, aunque a diferencia de los casos anteriores, su status racial no se aclara en la transacción, vende en 1752 a Basilio de Poesa dicha chacra.<sup>1099</sup> María de las Nieves y Mariano Andújar, pardos libres, herederos del Deán José de Andújar, venden en 1787 a Cipriano Peñalva una estancia de 5.125 varas de frente al Río Paraná, en el paraje del Espinillo.<sup>1100</sup>

## **M-VII Movilidad y persistencia en la propiedad rural**

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de 965 predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de 1.684 compraventas, protocolizadas entre 1701 y 1810.<sup>1101</sup> Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de 10,0 (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fué el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de 2,1. En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de 4,7; en la banda norte de la Matanza a 8,7; en las cabezadas de la Magdalena, a 7,0; en la banda sur del pago de Luján, a 10; y en el pago de San Andrés de Giles, a 2,1.

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1700 y 1820 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. Birocco (1992a) ha sido el primero que intentara una aproximación al tema de la familia en la campaña bonaerense del siglo XVIII, aunque reducido a una sólo jurisdicción. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran cómo numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares,

descendientes de antiguos pobladores, se mantuvieron en las mismas parcelas por cinco, seis o siete generaciones. En Areco, según el Cuadro B-III, 19 parcelas, que sumaron 56.000 varas, se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones, 16 parcelas; y por dos generaciones, tres parcelas. Los descendientes de Francisco Gaete Izarra, representados por José y Antonio Bague, se mantuvieron por seis generaciones. En el pago de los Arrecifes, según el Cuadro B-IV, 29 parcelas, que sumaron 155.000 varas, se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones 22 (veintidos) parcelas; y por dos generaciones 7 (siete) parcelas. Los descendientes de Bartolomé Sánchez, representados por los Agüero Linares, y los de Juan del Pozo y Silva y Ana Garro de Aréchaga, representados por Manuel José de Lavalle y Mercedes González Bordallo se perpetuaron por cinco generaciones. En el pago de los Arroyos, según el Cuadro B-V, 20 parcelas, 6 por tres o más generaciones, y 14 por dos generaciones. La extensa familia de los Castro y Borda, en varias de sus ramificaciones, se perpetuó hasta el siglo XIX. Y en el paraje de los Hornillos, ubicado en el mismo pago de los Arroyos, los descendientes de Diego Ruiz de Ocaña y Elena de Vivancos, pobladores de comienzos del siglo XVII, representada por la familia de los Leyva y Souto, se mantuvo en el lugar por cuatro generaciones, hasta mediados del siglo XVIII. En Cañada de la Cruz, según el Cuadro B-VI, 19 parcelas, que sumaron 51.000 varas, se mantuvieron en las mismas manos familiares. Por tres o más generaciones 23 parcelas, algunas como subdivisiones de parcelas madres. Algunas familias, descendientes de viejos pobladores, tales como Domingo Griveo, Andrés Gelves, Juan de Monsalve y Juan Gutiérrez Morejón, se perpetuaron hasta por seis generaciones. En los Rincones de San Pedro y Zárate, en la costa del Río Paraná, los descendientes de Juan Gutiérrez de Paz, Francisco Díaz de Perafán y Gonzalo de Zárate se mantuvieron hasta fines del siglo XVIII. En el paraje de la Cañada Honda, se perpetuaron algunos descendientes de la familia de Juan de San Martín. En el paraje de la Cañada de Giles, la familia Suero, descendiente de Pedro Giles y Paula Remón, se perpetuó en el pago hasta después de la Revolución de Mayo, tras sostener un prolongado litigio con los descendientes de Lorenzo de Lara.<sup>1102</sup> En el pago de las Conchas, según el Cuadro B-VII, 42 parcelas, que sumaron 41.000 varas, se mantuvieron en manos de las mismas familias. Por tres o más generaciones, 29 parcelas, y por dos generaciones 13 parcelas. Los descendientes de Amador Báez de Alpoin se perpetuaron por cuatro generaciones, los de Alfonso Caraballo por cinco generaciones, y los de Domingo Gribeo y Cristóbal Naharro por seis generaciones. En Luján, según el Cuadro B-VIII, 66 parcelas, que sumaron 78.500 varas, también se perpetuaron. Por tres generaciones 27 parcelas, y por dos generaciones 39 parcelas. Las familias descendientes de Antonio Pérez de Leguizamo y Margarita de Escobar, más conocidos por el apellido Leguizamón; la de Pedro Lobo Sarmiento y Melchora Díaz de Meneses; la de Marcos Rodríguez Flores y Catalina Martínez de Saravia; y la de Bernabé González Filiano y Francisca Trigueros alcanzaron a perpetuarse hasta seis generaciones. En Magdalena, según el Cuadro B-IX, 70 parcelas, que sumaron 243.000 varas, también se perpetuaron. Por tres o más generaciones 62 parcelas, y por dos generaciones ocho parcelas. Algunas ramas de las familias Arroyo, Avellaneda, Gómez de Saravia, López de Osornio y Lozano de Saravia, también se perpetuaron por más de cuatro generaciones. En Matanza, según el Cuadro B-X, 43 parcelas, que sumaron 125.000 varas, también se perpetuaron. Por tres o más generaciones 31 parcelas, y por dos generaciones 12 parcelas. Los clanes familiares de los Fernández de Agüero, González de Acosta, Gutiérrez de Paz, y Naharro de Humanes también alcanzaron a permanecer hasta fines del siglo XVIII. Y en la Costa de San Isidro, conocida más antiguamente por el pago de Monte Grande, según el Cuadro B-XI, 69 parcelas, que sumaron 21.000 varas, también se perpetuaron. Por tres generaciones, 21

parcelas, y por dos generaciones 48 parcelas. Las respectivas familias de Herrera y Verdún fueron las únicas que alcanzaron a permanecer por más de tres generaciones.

El derecho de abolengo también se practicó sobre varias chacras, estancias, y esclavos de Buenos Aires.<sup>1103</sup> En esta última provincia, las tierras que podían dar lugar al derecho de abolengo eran sólo aquellas ubicadas en pagos cuya colonización era de larga data, tales como Areco, Arrecifes, Conchas, Lujan, Escobar, Magdalena, Matanza, Monte Grande, Exaltación de la Cruz, y Morón. En 1770, Antonio Velázquez, inició juicio de retracto a Marcos Míguez, por las tierras de estancia en el pago de la Magdalena, que pertenecieran a sus padres el Cap. Isidro Velásquez e Isidora Josefa de Peralta. Velasco alegó que faltó al plazo perentorio de los nueve días por cuanto

"...en ese tiempo no me opuse por hallarse mis bienes todos secuestrados y reducido a una total inopia experimentando en mi persona una dilatada prisión".<sup>1104</sup>

En la misma década del 70, cuando María de las Nieves Díaz, mujer de Francisco Márquez, quiso vender sus tierras de chacra en el pago del Monte Grande, heredadas de su tía abuela María Ignacia Rodríguez de Figueroa, viuda del Capitán Juan de Melo Coutiño y Agüero, hizo oposición a ello Pedro Marín Mercado, su yerno, pretendiéndolas por el tanto contra su otro yerno Vicente José Basconcelos.<sup>1105</sup> En 1801, cuando Don Matías García Pérez, uno de los herederos de Bernardo García e Isidora Pérez, quiso vender al Cura Párroco de San Nicolás, Pbro. Julián de Gainza, una chacra en la Costa de San Isidro, su hermano Blas García Pérez, con dineros de Don Gaspar de Santa Coloma, se opuso con éxito pues la quería por el tanto para él.<sup>1106</sup> En 1819, Juan Almeida, heredero de Gregoria Zárate, vendió a Mariano Palacios y Rodríguez y Luis Zárate unas tierras para estancia sobre el Río Paraná, en el Rincón que llaman de Zárate, con la condición

"...que si algún día determinasen vender el todo de ambas suertes o parte de ellas han de preferir a los parientes que procedan de los abuelos Doña Gregoria Zárate y Don José Rodríguez".<sup>1107</sup>

En 1825, José María de Achával, a nombre de Mercedes Madariaga, solicitó infructuosamente retraer la venta de una chacra en el pago de la Matanza, fundándose en que la finca era patrimonial y abolenga.<sup>1108</sup> El mismo año, cuando José Antonio Fillol, residente y vecino de los Santos Lugares, trató la venta de unos terrenos de chacra en el partido de Cañada de la Cruz, con Don Enrique Almada, los hijos de Fillol "...salieron oponiéndose a ella manifestándole que ellos heren preferidos por el tanto que aquél les diese".<sup>1109</sup>

## **M-VIII Herencia y loteo como mecanismos de fragmentación**

La fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural bonaerense, fuente de una profunda inestabilidad social, operó a través de la herencia y el loteo. En cuanto a la herencia, como mecanismo redistribuidor de la tierra, los Cuadros mencionados ilustran sobradamente esta problemática.<sup>1110</sup> Dichos Cuadros también revelan como operó el loteo, como mecanismo redistribuidor. En Areco, el Cap. Juan de San Martín formalizó entre 1709 y 1728 media docena de operaciones de venta. En Arrecifes, Rosa del Pozo y Garro formalizó entre 1761 y 1782 una decena de operaciones, totalizando unas 9.000 varas. En 1819 José Santiago Sosa y Micaela Rafaela de Sosa, marido y mujer primos hermanos, practicaron cuatro operaciones totalizando 13.650 varas.

En el pago de los Arroyos, Trinidad Castro y Borda, mujer de Manuel Bernardo Cuello, practicó entre 1767 y 1799 una docena de operaciones, ocho frente al Arroyo del Medio, totalizando 35.000 varas, y cinco frente al Arroyo Ramallo, totalizando 7.000 varas. Francisco Javier de Ugarte, hijo de Francisco Miguel de Ugarte y Casilda Cepeda, practicó entre 1759 y 1765 una decena de operaciones, seis frente al Arroyo del Medio, totalizando 15.000 varas, y cuatro frente al Arroyo Ramallo, totalizando 14.000 varas. En el pago de las Conchas, Marcos Alarcón y Juana Iturri practicaron en 1778 cinco operaciones totalizando 1.300 varas de tierras de chacra. En Luján, Sebastián de Morales y Gregoria de Saavedra, practicaron entre 1741 y 1743 cuatro operaciones totalizando 2.500 varas. En el pago de la Magdalena, Domingo Hidalgo, como apoderado de los herederos de Lorenzo de Lara, practicó entre 1798 y 1802 media docena de operaciones totalizando 18.000 varas. José Antonio Rojas y Acevedo, como heredero de su abuelo Pedro de Roxas y Acevedo, practicó entre 1724 y 1737 una docena de operaciones de venta totalizando 28.000 varas. Y en el pago de la Matanza, Juan Francisco Tagle Bracho, heredero de su madre Antonia de Loyola y de las Casas, practicó entre 1733 y 1765 media docena de operaciones totalizando 7.000 varas. Muchos de estos adquirentes, tal como lo ilustra Birocco (1992b) para el caso de Andrés Gelves y Bernardo Peñalva, fueron previamente arrendatarios de las tierras que adquirieron.<sup>1111</sup>

Al intenso proceso de loteo y fragmentación hereditaria, le siguió asimismo un intenso proceso inverso y compensatorio, de consolidación de la propiedad inmobiliaria. A los efectos de mantener la unidad de los predios familiares, se siguieron diversas estrategias. La más común consistía en vender todo a un solo miembro de la misma familia. En el partido de Pilar, río Luján abajo, banda del oeste, cuando Bernardino Abalos falleció, sus numerosos descendientes se repartieron amistosamente unas 650 varas de tierras de estancia, que había adquirido en 1725 en mayor número de varas a Don José Jacinto de Valdivia y Bergara, por ante el escribano José Esquivel. Más luego, algunos de los hijos de Don Bernardino fueron vendiendo, pero siempre dentro del núcleo familiar. Petrona Ávalos vendió a su hermano Luis Ávalos, y este último a su otro hermano Juan Ávalos, y todos juntos vendieron en 1814 y 1818 a su coheredero Santos Cordero.<sup>1112</sup>

Asimismo, cuando José Lobo Sarmiento y su mujer María Magdalena de las Casas fallecieron, a fines del siglo XVIII, sus herederos se dividieron sus tierras en 1799 a razón de: 1.500 varas a Juan José Lobo, 750 varas a Tadeo Lobo, y 1050 varas a Martín Lobo.<sup>1113</sup> Y cuando Ignacia Palomeque, viuda de Martín Lobo, falleció, dejando 761 varas de estancia, también fueron divididas en 1838 entre sus herederos, los cuales vendieron a su cuñado Anastasio Pacheco.<sup>1114</sup> Cuando María Luisa, Feliciano, y Catalina de Leyva, heredaron de su madre Juana María Leguizamón, mil varas de tierra de estancia, las vendieron en 1794 a su tía o prima Isabel Leguizamón.<sup>1115</sup> Cuando Salvador y Narciso Palomeque, heredaron de su padre Francisco Palomeque y Josefa Leguizamón sus respectivas legítimas, de 562 varas cada una, las vendieron a su pariente político Juan Pablo Ferreyra.<sup>1116</sup> Asimismo, cuando Manuel José Ferreyra Méndez, hereda a fines del siglo XVIII, de sus padres Juan Pablo Méndez y Manuela Palomeque, 250 varas de tierras para estancia, las vende en 1806 a su pariente Gerardo Palomeque, hijo de Francisco Palomeque y Josefa Leguizamón.<sup>1117</sup> Cuando Luciano, Juan Santos, e Isidro Burgos, heredan de Silvestre Burgos un terreno de estancia situado del otro lado del Río Lujan, deciden vender en 1825 a su coheredero Manuel Marcelino Burgos la totalidad de las 1.166 varas.<sup>1118</sup> También en el pago de Magdalena, al fallecer Juan de Ortiz y Antonia de Zamudio, su heredero el Asistente Domingo Cayetano de Ortiz vende 600 varas de frente a su sobrino Ambrosio Ortiz.<sup>1119</sup> Y en el pago de las Conchas, Tadea y Francisca Silberia

Ibarrola, Micaela Ibarrola, viuda de Miguel del Mármol, y Francisca Bruna, viuda de Miguel Grimau, herederas de Agustina Gribeo y de Juan de Ibarrola, venden en 1824 una antigua chacra que había pertenecido a sus antepasados desde el siglo XVII, a su sobrina Mercedes Ibarrola.<sup>1120</sup> También se dio el mismo fenómeno con extraños. Las causas de la intensa fragmentación y movilidad dominial deben ser también atribuidas al régimen testamentario.

La intensa movilidad del mercado inmobiliario rural también obedecía a la extrema subdivisión en que recayó la propiedad de la tierra en determinados pagos. Exaltación de la Cruz y los Arrecifes eran unos de dichos pagos. En aquella se llegaron a vender derechos y acciones a terrenos procedentes de antepasados remotos cuyos descendientes se habían multiplicado a ritmo desenfrenado. Este era el caso de los descendientes de Jacinto Correa, cuyos dominios fueron adquiridos entre 1837 y 1839, en media docena de operaciones, por el criador de merinos Federico Massot.<sup>1121</sup> En el pago de los Arrecifes fue el caso de los descendientes de Andrés Lozano de Saravia y Manuel Gómez de Saravia, pobladores del siglo XVII, cuyas cabezas --integradas en el siglo XIX por Nicolás y Victoria Lozano, Vicente de la Canal, Juan Antonio Castro, y Eusebio y Martín Lozano-- acordaron y convinieron en 1825 "...en atención a la multitud de descendientes y herederos que han sucedido y ser muy corto o casi nada el número de varas que pueden pertenecer a cada uno" venderlas a Francisco Pérez Millán.<sup>1122</sup> Y en la Cañada de Morejón, partido de la Capilla del Señor, Tadea, Pascuala y Petrona López, hermanos y herederos de Teodora Olivera, quién fué heredera de su madre Lorenza Cordovéz; y Pedro Sebastiani, nieto de Magdalena Cordovéz; y ambas Lorenza y Magdalena Cordovéz, hijas de Luis Cordovéz, donaban a Tomas de Olivera, otro de los tantos herederos de Luis Cordovéz las partes que les corresponden;

"... mediante a que siendo como son muchos los interesados vienen a corresponderles una porción muy exigua y a que por otra parte su valor no permite que cada uno de por sí entre respectivamente en el reclamo y esclarecimiento en la parte que le toca principalmente cuando se hace necesaria una mensura precisamente costosa para esclarecer la extensión y verdaderos límites de dichas tierras por defecto de los títulos de propiedad cuya existencia se ignora en el día".<sup>1123</sup>

## **Conclusión**

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.

## Índice

- N-I Tradición historiográfica sobre la mano de obra colonial
- N-II Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.
- N-III Vinculación de los encomenderos con los empresarios.
- N-IV Concentración poblacional en Pueblos de Indios.
- N-V Mita, Tributo y Yanaconazgo.
- N-VI Crisis minera colonial.
- N-VII Revisitas Indígenas.
- N-VIII Corriente migratoria indígena.
- N-IX Corrientes migratorias forzadas.
- N-X Desequilibrio demográfico.
- N-XI Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.

### **N-I Tradición historiográfica sobre la mano de obra colonial**

A diferencia del Perú, donde según Paz Soldán (1868-74) --tomando de una carta que Félix Durán había escrito a Tomás Guido-- la impotencia para colaborar con la emancipación Americana y la necesidad que tenía de una fuerza extraña para su redención la atribuía a "...la abundancia de castas índica [hindú] y etiópica [africana] y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes entre los americanos blancos y los indios",<sup>1124</sup> en Chile y el Río de la Plata, Mitre (1887), fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana (1854-58), sostenía que un intenso y prolongado mestizaje había engendrado una raza criolla.

Asimismo, la tradición historiográfica había advertido en el pasado colonial una contradicción muy aguda entre la clase de los vecinos encomenderos, que vivían de extraer el excedente a sus indios encomendados, a través del tributo, y los residentes comerciantes no-encomenderos. El más fuerte obstáculo que la mayoría de los colonos peninsulares tenía para obtener mano de obra indígena y desarrollar sus propias empresas de producción lo constituían en el mundo andino los ayllus (comunidades),<sup>1125</sup> y en el mundo sub-andino los encomenderos.<sup>1126</sup> A su vez, para Schwartz (1979), los Americanos percibían el status de vecino encomendero como más relevante que la mera condición estamental de noble o patricio.<sup>1127</sup>

No obstante estas posiciones, Golte (1980) le asigna equivocadamente al estamento encomendil la connotación de clase social, enfrentada a otra supuesta clase social constituida por los Corregidores. La imposición en el siglo XVIII del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a un estamento encomendil --ya por cierto bastante erosionado por la galopante inflación, la crisis demográfica y la prohibición del servicio personal-- habría significado para Golte un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría implicado la frustración de dicho embrión.<sup>1128</sup> La devaluación del dinero metálico y la correlativa inflación o alza de los precios significó una profunda erosión de la base material de la elite encomendil, la cual recibía de sus encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas, todo lo cual la inhabilitaba para participar de la venalidad, o como suele denominarse hoy, la privatización de los oficios públicos. Por último, la historiografía más reciente ha señalado que la presencia a comienzos del siglo XVII del mercader-encomendero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades, habría amortiguado la contradicción entre

mercaderes y encomenderos, señalada por la historiografía liberal, por lo que la misma y la tesis de Golte carecerían de sustento.

No obstante la tesis apuntada al comienzo, el estado colonial padeció de una crónica y cíclica inestabilidad, debido fundamentalmente a la desigual oferta de tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial. A juicio de Pastore (1990,1991), fundado en Domar (1970), la escasez de mano de obra indígena en el Paraguay, combinada con la abundante oferta de tierras, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, como la encomienda mitaria y la encomienda yanacona u originaria.<sup>1129</sup> Más aún, según Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981), estos mecanismos coactivos le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>1130</sup> Siguiendo estos argumentos, la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú combinada con la alta oferta de yacimientos mineros condicionó asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente como la mita y la encomienda. Asimismo, la escasez de mano de obra rural en las campañas de Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, combinada con la alta oferta de tierra libre, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo.<sup>1131</sup> González (1973) prueba la existencia de esta institución ya en tiempos del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte. Profundizando previas investigaciones de mi autoría acerca de los conciertos de indios celebrados en el siglo XVII entre regiones geográficamente apartadas, y otras investigaciones de diversos autores, los indios encomendados, los vecinos encomenderos y la mano de obra rural en general revelarían una intensa movilidad y mestizaje y una profunda inestabilidad social.<sup>1132</sup> Para corroborar esta tesis me he servido tanto de los conciertos de indios registrados notarialmente en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII como de la información brindada por los padrones de población, los numerosos procesos judiciales, y las nóminas proveídas por Larrouy (1927), Ravignani (1932), Doucet (1980), Mora Mérida (1973), Lorandi y Ferreiro (1991), y Spangenberg (1992). No obstante que el trabajo de Mora Mérida se refiere a la mitad del siglo XVII, el de Ravignani al año 1674, el de Doucet a 1695, el de Larrouy a los años 1702 y 1718 y el de Spangenberg a 1754, sus proximidades cronológicas para con el período correspondiente a los datos reproducidos en mi trabajo en la Tabla F-I (1620-1654), los han vuelto inestimables. Para completar los datos biográficos me he servido también de los trabajos de Figueroa (1927), Cornejo (1945), Luque Colombres (1948), Solveyra (1974), Crespo Naón (1976) y Doucet (1984).

## **N-II Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.**

Confirmando la tesis de la naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, a mediados del siglo XVII, en Buenos Aires, un numeroso grupo de vecinos encomenderos, se coaligó estrechamente con comerciantes criollos, portugueses y peninsulares. La burguesía comercial residente en Buenos Aires habría buscado entonces en los encomenderos del interior apoyo contra la gran burguesía Limeña, consignataria del capital comercial monopolista de Sevilla, aliada de los azogueros,<sup>1133</sup> y del capital mercantil enquistado en el enclave minero altoperuano; a fin de controlar por métodos legales o ilegales una cuota mayor del comercio ultramarino. Asimismo, como estrategia para evitar el descenso social, los encomenderos se involucraron como fiadores u apoderados en el comercio a larga distancia con el Alto Perú y Chile. En la Tabla F-II compruebo la estrecha relación que se dio entre encomenderos del interior y comerciantes residentes en Buenos

Aires y en un trabajo de mi autoría ilustro la nómina de mercaderes encomenderos que se dieron en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII.<sup>1134</sup>

Si bien las fuentes primarias elegidas para esta investigación difieren entre sí cronológicamente desde un cuarto de siglo hasta un siglo, el cotejo entre las mismas permite comprobar que la alta movilidad de la mano de obra encomendada y la intensa fragmentación territorial de los Pueblos de Indios generó una pronunciada inestabilidad en la elite patricia. Para esta comprobación contamos con una información casi completa sólo para los casos de Santiago del Estero y Tucumán. Sólo una docena de encomenderos Santiagueños existentes en la primera mitad del siglo XVII, sobre un total de 33 encomiendas, es decir casi una tercera parte, ilustrada en la Tabla F-III, mantuvo una cierta continuidad hasta comienzos del siglo XVIII. Y de otra docena de encomenderos Tucumanos existentes en la primera mitad del siglo XVII, sobre un total de 33 encomiendas, ilustrada en la Tabla F-III, ocurre algo semejante. Para las demás provincias, y específicamente la de Córdoba, las Tablas F-IV y F-V confirman el aserto.

### **N-III Vinculación de los encomenderos con los empresarios.**

La vinculación de los encomenderos del interior con los empresarios no encomenderos de Buenos Aires siguió un patrón muy desigual. En aquellas provincias donde la población indígena había sufrido a mediados del siglo XVII una erosión demográfica y una fragmentación territorial muy intensa, que generó una corriente migratoria indígena y mestiza hacia el sur, el número de encomenderos vinculados con Buenos Aires fue proporcionalmente mayor. En efecto, en Santiago del Estero, 52 encomenderos, o 17 más de los registrados en 1674, habían alquilado sus indios en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII; en Santa Fé, 16 encomenderos, o sea 2 encomenderos más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios; y en Córdoba, 51 encomenderos, o sea 35 encomenderos más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios. Por el contrario, en aquellas provincias donde la población indígena había sufrido una caída demográfica menos intensa, el número de encomenderos vinculados con Buenos Aires y por consiguiente la corriente migratoria indígena y mestiza fue proporcionalmente menor. En efecto, en La Rioja sobre 51 encomenderos existentes en 1674, 14 encomenderos, o el 27%, habían alquilado sus indios en la primera mitad del siglo XVII a los empresarios de Buenos Aires; en Jujuy, sobre 9 encomenderos, 2 de ellos, o el 22%, alquilaron indios; en Salta, sobre 20 encomenderos, 5 de ellos, o el 25%, alquilaron indios; en Corrientes, sobre 41 encomenderos sólo 4 de ellos, o el 10%, alquilaron indios a los empresarios porteños; y en Tucumán, sobre 38 encomenderos, 29 de ellos, o el 76%, alquilaron sus indios.

### **N-IV Concentración poblacional en Pueblos de Indios.**

El despojo de las tierras del dominio de los indios, operó al decir de Carmagnani (1988) como un verdadero mecanismo de expulsión de originarios que alteró el equilibrio demográfico que mantenían con la población esclava y liberta; y la concentración poblacional en Pueblos de Indios, orquestada por Benjamín de Matienzo en las Reformas Toledanas (1570), funcionó como condición necesaria del denominado reparto de mercancías.<sup>1135</sup> Gran parte de las facturas o memorias de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos de fortines o guardias de frontera, por los Gobernadores en sus Visitas y Revisitas que fomentaban las licencias para beneficiar cueros en las Entradas al Desierto o yerba en los yerbatales silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos

podieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban sujetos.<sup>1136</sup> En el Paraguay, el beneficio de los yerbatales silvestres del norte mediante la llamada mita yerbera fue uno de los mecanismos que más contribuyó a la despoblación de los Pueblos de Indios.<sup>1137</sup> Gaspar Rodríguez Francia, en su cruel gestión al frente del Pueblo de Indios llamado Yaguarón,<sup>1138</sup> hizo que Pedro Juan Motatí, natural del mismo, se dirigiera al Virrey, para denunciar que

"...desde el principio de su Ministerio empezó a oprimir con todo género de trabajos a sus naturales, ejercitando con ellos una crueldad inaudita; de tal suerte que amenazaba la última desolación a aquel afligido Pueblo con tan cruel dominación...Quien podría pensar que las violencias se extendiesen hasta despojarnos de nuestras propias hijas y mujeres, cometiendo con ellas el más horrendo crimen que la malicia humana puede escojitar: de este modo ha aglomerado el Administrador delito sobre delito, y se ha fabricado por sus propias manos instrumentos para su maior ruina. Otros tantos Administradores y enemigos de su libertad reconocen los Indios, quantos hijos tiene consigo dicho Francia, en una palabra hambre, sed, desnudez, pobreza, trabajo, vexaciones, violencia, y maltratamientos ha sido lo que este Pueblo ha experimentado sin intermisión de su Administración".<sup>1139</sup>

#### **N-V Mita, Tributo y Yanaconazgo.**

Y en el Alto Perú, la Mita de Potosí, el aumento de los tributos y el yanaconazgo en las haciendas fueron los mecanismos que alimentaron la despoblación de los ayllus de indios originarios (tributarios) y los que generaron una inmensa población de mingas y forasteros, legítimos e ilegítimos.<sup>1140</sup> Las clases de tributarios eran variadas, registrándose en Tarija, los originarios con tierras, los forasteros sin ellas, churumatas, tendarunas, y yanaconas de chacras. Los Churumatas, que pagaban de tributo ocho pesos y cinco reales,

"...se suponen con tierras, pues aunque no las tienen propias, por no componer esta clase de contribuyentes cuerpo de comunidad, se dejaban franquear los Dueños o Amos sus Haciendas a que están afectos, como a los yanaconas de chacras a cuya especie se asemejan".<sup>1141</sup>

Los Tendarunas, que contribuían también la tasa de ocho pesos y cinco reales, se aplicaban

"...al servicio de los Gefes y Oficiales Militares en campaña y fuera de ella, quienes estaban obligados a mantenerlos, vestirlos, pagar su tributo, casamientos, entierros y darles tierras como a los demás Indios que con nombre de yanaconas se aplicaron a los Dueños de chacras".<sup>1142</sup>

Más luego, el Tendaruna prefirió sustraerse al servicio de Milicia y pagar por sí el tributo para gozar de libertad, pero

"...se mantiene y arrienda tierras como un mero Forastero, aunque por otra parte se halla libre de servicio personal; pero su tasa es la mayor que se satisface [ocho pesos y cinco reales], y hacen los muy vivos esfuerzos para eximirse ausentándose o mezclándose con los Forasteros que pagan siete y medio, siendo esta la causa de la minoración de esta especie de contribuyentes en cada Revisita".<sup>1143</sup>

## **N-VI Crisis minera colonial.**

Lo que más engendró la fuga de los indios fue el aumento de los tributos y la crisis minera colonial.<sup>1144</sup> Tord Nicolini y Lazo (1981) nos revelan que en el Alto Perú los tributos aumentaron en la década de 1780 un 40%.<sup>1145</sup> En 1792, en el partido de Larecaja, Provincia de La Paz, a cambio de la derogación del salario,<sup>1146</sup> y de la llamada tasa de especies,<sup>1147</sup> les fue impuesto a los Indios, bajo el eufemismo de uniformidad, el aumento de los tributos, de cinco pesos al año a seis y siete pesos, tal como "...se benía entablado con los de comunidad, matriculando a unos con nombre de originarios, y carga de siete pesos al año, y a otros con la denominación de forasteros, y pensión de seis pesos anuales".<sup>1148</sup> En la Intendencia de Salta, el tributo representaba el 23% de los recursos fiscales.<sup>1149</sup> Y en Tarija, para libertarse del tributo, los Indios Forasteros

"...que recalán de otras Provincias llamados por la fertilidad del terreno, y sebo del vicio Dominante de la chicha, siendo desconocidos y encontrando varias clases libres con que confundirse se injieren en ellas, y se prestan voluntarios a la Lista de Soldados".<sup>1150</sup>

Al abrigo de la condición de soldado los Indios sufragan muchas causas:

"...la mas poderosa, el universal fastidio que comprenden al moderado tributo que se exige, y por otra parte el provecho de muchos particulares Asendados o Labradores que protejen a los que pueden servirlos, o arrendar sus tierras; de modo que como se miran con indiferencia los intereses de Su Magestad por los que no tienen particular encargo de promoverlos propenden a la libertad del que quiere eximirse de la contribución, certificando el Capitán por su soldado, y los demás atestiguando la calidad de libre de que quieren rebestir al pretendiente".<sup>1151</sup>

Como las expediciones militares eran poco frecuentes, y cuando ocurrían los Indios podían ocultarse, o ausentarse durante la convocatoria, "...les aprovecha mas el título de soldado que el de Tributario expuesto en cada tercio a la recompención del Curaca o Cobrador".<sup>1152</sup> Vemos entonces que a pesar de las Reformas Borbónicas, el tributo siguió representando aquí el elemento central de la sociedad y la economía.<sup>1153</sup>

## **N-VII Revisitas Indígenas.**

Para la confección de las Revisitas, sobre cuya base se calculaba el monto del tributo, se acudía a los Libros Parroquiales. Pero la fe que estos merecían inducía a una prudente desconfianza. Como por los Bautismos no se llevaban derechos, "...y en cuanto a ellos son iguales las condiciones se inclinan a la que mejor les indemnice en lo futuro, y los distingue respectivamente del Indio, cuya calidad (ecepto la del negro) se reputa erróneamente la mas inferior: con todo, en favor del interés pecuniario, renuncian el pundonor, y como los derechos del Indio en los casamientos son mucho menos que de las demás clases, quando se presentan al Matrimonio confiesan y aun alegan ser Indios".<sup>1154</sup>

Pero aun supuesto este desorden involuntario de los Libros Parroquiales en perjuicio de la casta tributaria, "...todavía arreglándose a ellos y por sus cotejos deberían ser muchos mas los contribuyentes del Partido".<sup>1155</sup> Por ejemplo, en el curato de la Villa de Tarija, la Revisita del quinquenio de 1705 rindió 260 bautizados de origen "tasero" o tributario,

"...sin contar los que no se apuntan por descuido, o se ponen por mestizos,...debiéndose de estos rebajar mas de la mitad naturales de otras Doctrinas, y algunos de estraña Provincia; de manera que solo se deben contar ciento cincuenta o sesenta tributarios Parroquianos por su nacimiento".<sup>1156</sup>

Formándose los cálculos políticos y combinaciones mas congruentes y se descubrirá una gran deformidad y desproporción en este Punto, prueba evidente de que

"...cuando van llegando a la edad de poder contribuir degeneran maliciosamente de su natural condición, y se meten soldados confundiéndose con las demás castas libres, seguros de poder ser descubierto por un prolijo escrutinio que jamás se practica y deja un camino franco a las usurpaciones y sucesivas quiebras del Ramo que apenas se podrá remediar, por que el que su puso de soldado en calidad de mestizo, mulato o pardo se ampara de esta posesión, induciendo doble dificultad para rebertirlo a su verdadero estado: tampoco se puede negar el que esta misma confusión puede perjudicar a algunos de condición libre grabándolos con el tributo".<sup>1157</sup>

Como en el quinquenio se han ausentado muchos, muerto y reservado algunos por su edad, los Curacas "...se ven en la precisa necesidad de remplazarlos con otros que descubren en el Partido Naturales o Forasteros advenedizos, cuyos nombres no aparecen en la anterior Revisita".<sup>1158</sup> Con respecto a estos Forasteros, y para que fuesen oídos en Justicia, y ordenanza, se añadió en el Bando

"...la citación que se les hace para que expongan, y aleguen personalmente lo conducente a su libertad, o a la satisfacción de cualesquiera agrabio que se les haya inferido, dándoles por termino perentorio todo el tiempo de la Revisita, el que pasado les perjudicaría para continuar en la satisfacción del Tributo que han satisfecho dentro del quinquenio: los que nos han parecido haber padecido injusticia según lo que han representado y provado, no hallándose asentados en la anterior Revisita, se han restituido a su libertad y continuado en la pensión los que nada han reclamado".<sup>1159</sup>

Para que la Orden de que no se alistasen en la Milicia los que deben ser taseros, los Regidores Tarijeños Pedro Francisco del Valle y Francisco Xavier Arballo, propusieron que la formación de las Listas Militares, o el reemplazo de las Plazas Vacantes se hiciere con intervención del Subdelegado (o recaudador del Ramo), para que

"...registre los Padrones que rijen la cobranza y advierta si el individuo que se pretende alistar, se halla empadronado, o aunque no lo esté deba estarlo mediante las indagaciones o justificaciones que así lo convenzan; y por que puede suceder que los oficiales Militares reemplazen sus compañías sin noticia del Subdelegado, que pueda este siempre que lo sospeche, pedir las Listas y estén obligados a franquearlas para que se registren y cotejen con los Padrones de Revisita".<sup>1160</sup>

Asimismo, en atención a que el Indio Legítimo

"...siempre trae consigo la genealogía exterior de su condición, sea igualmente necesaria la asistencia del Subdelegado en las Revistas anuales que deben practicarse, para que ocularmente adviertan las personas que por su aspecto y

demás accidentes induzcan sospecha, y puedan practicarse las diligencias y averiguaciones conducentes hasta haber calificado su verdadero origen".<sup>1161</sup>

Respecto a la escrupulosidad que se observaba en los Libros Parroquiales, con relación a la calidad de los bautizados y casados, que se ponen difiriendo al dicho de los interesados, y para que revistiesen mayor crédito

"...convendría el que precediese al acto de asentar la partida averiguación de dos testigos desinteresados presentados por los Padres o contrayentes que atestiguaran bajo juramento la calidad verdadera de estos con distinción y fundamento, para discernir la exaltación o degradación de las sucesiones con que se apartan o revierten a la condición Taserá".<sup>1162</sup>

#### **N-VIII Corriente migratoria indígena.**

La corriente migratoria indígena, mestiza y liberta, voluntaria o forzada, y la articulación del régimen encomendil con la sub-metrópolis mercantil porteña, no se detiene en el siglo XVII, sino que se perpetúa y aún acentúa en el siglo XVIII. Susnik (1965) y Cooney (1990) hacen referencia al caso del Paraguay, donde los dueños de barcas, para la carrera de navegación río abajo del Paraná, debían dar fianzas de restitución por los peones embarcados.<sup>1163</sup> Barrios Pintos (1973), en su descripción de la Banda Oriental hace mención de los arrieros y faeneros de las vaquerías o corambres, los cuales en su mayoría provenían de Santa Fé.<sup>1164</sup> Robinson (1974) destaca que en los casos de Jáchal, Valle Fértil y Nueva Orán, ubicadas en San Juan, Mendoza y Salta, respectivamente, sus poblaciones fueron ciertamente menos Europeas que las de las ciudades más antiguas.<sup>1165</sup> Amén de los indios Quilmes, originarios de los Valles Calchaquíes y reducidos en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el pago de la Magdalena, luego de la Gran Rebelión acontecida a mediados del siglo XVII; se dio también en Buenos Aires la reducción de los indios Malbalaes, originarios del Chaco Salteño, habitantes de la margen derecha del Río Bermejo. Estos indios Malbalaes fueron encomendados en 1711, en número de 500, por el Gobernador Estéban de Urizar y Arespacóchaga a su paisano el Maestre de Campo José de Arregui, quien los trasladó a su chacra, ubicada en el pago de la Matanza, provincia de Buenos Aires, actual localidad de Tapias.<sup>1166</sup> Es muy probable que en este fenómeno haya jugado algún rol la creciente despoblación de las reducciones indígenas. Estas últimas, antiguamente en manos de los Jesuitas, entraron en una profunda decadencia en gran medida debido al proceso de dilapidación de sus tierras y útiles de labranza, fruto de la codicia de sus sucesivos Administradores.<sup>1167</sup> Finalmente, con la Expulsión de los Jesuitas, en 1767, la diáspora de indios alcanzó niveles insospechados.<sup>1168</sup>

#### **N-IX Corrientes migratorias forzadas.**

También hubo corrientes migratorias forzadas compuestas por cautivos, presidiarios y condenados. En 1793, el Comandante de Armas de Mendoza José Francisco Amigorena rescató de manos de los Indios Pehuenches el inverosímil número de 300 cautivos.<sup>1169</sup> El yacimiento de Famatina, en La Rioja,<sup>1170</sup> los minerales de oro de La Rinconada, en Jujuy,<sup>1171</sup> y de La Carolina, en San Luis, fueron provistos con mano de obra forzada. Asimismo, el empedrado de Buenos Aires fue practicado con mano de obra carcelaria, proveniente de la Isla Martín García, la cual a su vez se componía en gran medida de cuatreros y/o bandoleros apresados en las serranías Cordobesas. La lista de los reos aprehendidos en 1795 por los Jueces Pedáneos de Córdoba, registrada en la Tabla F-

VI, lamentablemente no revela la casta de cada uno de los reos. De 67 presidiarios (sobre un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fue registrado, el 38% (26 casos) fue aprehendido en el partido de Traslasierra; 5 en el Valle de las Palmas; 5 en la Punilla; 4 en Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en Calamuchita. La mayor parte de los mismos fueron remitidos a los bajeles surtos en el puerto de Montevideo. El resto de los presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a parar a las minas de Famatina y a la construcción del Acueducto para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba. Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios de ellos caen enfermos, siendo necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.<sup>1172</sup>

#### **N-X. Desequilibrio demográfico.**

Fue en el Obispado de Tucumán, donde el equilibrio demográfico entre las poblaciones indígenas, mestiza y liberta, alcanzó en oportunidad de la fundación del Virreinato (1776) la desigualdad e inestabilidad más notoria.<sup>1173</sup> En 1776, en Jujuy y La Rioja, la población indígena superaba ampliamente a la población liberta. En Jujuy, los Curatos de la Capital, Tumbaya, Humaguaca, Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina y Río Negro, sumaban --según las Tablas F-VII y F-VIII-- algo más de 8.000 indios y casi 1.500 mulatos, zambos y negros libres. Los Protectores de Naturales debieron extremar sus recursos para defender a las numerosas comunidades indígenas aún subsistentes. Los indios de Pulares, Cachi y Paiogasta, en la Quebarada de Humahuaca, se vieron por ejemplo precisados a litigar con las Juntas de Temporalidades.<sup>1174</sup> En La Rioja, mientras los Curatos de la Capital, Los Llanos, Guandacol, Arauco y Famatina sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 4.000 indios y casi 500 mulatos, zambos y negros libres; los Pueblos de Indios de Sanagasta, Machigasta, Aimogasta, Sauces, Pituil, Famatina, Malligasta, Anguinan, Sañogasta, Vichigasta y Olta, quienes tributaban al Rey en lienzo de algodón, sumaban según Torre Revello (1946) a fines del siglo XVIII apenas un centenar de indios.<sup>1175</sup>

Pero en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, la población liberta superaba ampliamente a la población indígena. En Salta, los Curatos de la Capital, el Rosario, Chicuana, Calchaquí, Perico y Río del Valle, alcanzaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 2.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y negros libres (4.000). En las Reducciones indígenas del Chaco Salteño, los Protectores de Naturales debieron también extremar sus recursos para defender a los indios pertenecientes a las pocas comunidades indígenas aún subsistentes.<sup>1176</sup> Específicamente, el Protector de Naturales, a nombre de los indios Huracaraes, reclamó contra el despojo perpetrado por María Luisa Aguirre.<sup>1177</sup> La Reducción de Balbuena, una de las cuatro Reducciones del Chaco Salteño, debió litigar con el poderoso hacendado Mateo de Saravia y Jáuregui.<sup>1178</sup> En Santa Fé, las naciones Guaycurúes, Mocovíes, Abipones y Charrúas, que fueron reducidas en los Pueblos de Indios de Cayastá, San Javier y San Gerónimo, así como luchaban contra la dominación colonial, se embarcaron también en cruentas luchas fratricidas.<sup>1179</sup> En Santiago del Estero, mientras los Curatos de la Capital, Salavina, Soconcho, Sumampa, Tuama, Guañagasta y Salado, sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 3.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y negros libres (5.500); la veintena de Pueblos de Indios, entre los cuales se contaban Tuama, Matará, Mopa, Soconcho y Guañagasta, sumaban cerca de 3.500 indios.<sup>1180</sup> En Tucumán, los Curatos de la Capital, Chiquiligasta, Chorromoros y Marapas, totalizaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 3.500 indios y casi el triple de mulatos, zambos y negros libres (12.000). Los Protectores de Indios, como Salvador Alberdi, también

debieron extremar sus recursos para defender del acoso de las autoridades seculares y de los mayordomos de estancias a los integrantes de las comunidades indígenas aún subsistentes.<sup>1181</sup> Por ejemplo, el Alcalde de Hermandad Miguel Aráoz fue procesado por despojar a los comunidades indígenas de sus muchachos indios y mestizos.<sup>1182</sup> Los pocos indios aún sobrevivientes en 1800, de la encomienda de Aligilán, pertenecientes en el siglo XVII al encomendero Martín de Savala,<sup>1183</sup> fueron despojados de sus tierras por Juan Gregorio Rizo Patrón;<sup>1184</sup> y el pueblo de indios de Choya, de sus aguas, por el Pbro. Pedro Ignacio de Arce.<sup>1185</sup> Rizo Patrón alegaba que el Pueblo de Aligilán había vendido por escritura pública en 1720 parte de su territorio y luego había quedado yermo "...por haber fallecido todos los naturales".<sup>1186</sup> En Catamarca, mientras en los curatos de la Capital, Belén, Ancaste y el Alto la población indígena reunía en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, casi 3.000 indios, la población liberta alcanzaba a 7.000 mulatos, zambos y negros. A comienzos del siglo XVIII, sobre las tierras de indios de Singuil, se mantuvo un prolongado litigio del cual fue protagonista el terrateniente García Roldán.<sup>1187</sup> En Mendoza, los naturales de Lagunas y Corocorto fueron ultrajados por el Teniente Corregidor Manuel Martínez Caballero.<sup>1188</sup> Y en Córdoba, mientras los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco, Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, 3.000 indios y más del doble de mulatos, zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones gradualmente diezmadas.<sup>1189</sup> Para la formación de los padrones concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos, y aún los negros mismos".<sup>1190</sup> Los dueños de estancias no estaban exentos de responsabilidad en la despoblación de los Pueblos indígenas de Córdoba. En 1810, por ejemplo, el Protector de Naturales, en representación del Pueblo de Quilino, se quejaba de los perjuicios causados por el hacendado Anselmo Moyano.<sup>1191</sup> En el Pueblo de San José, en los Ranchos del Río Segundo, el Protector de Naturales reclamó en 1800 por las tierras de sus indios, los cuales eran procedentes de los Valles Calchaquíes.<sup>1192</sup>

Para el Litoral, lamentablemente carecemos de cifras combinadas acerca de la población indígena y liberta. En el Paraguay, al no ser posible retacear las Licencias para conchabarse en la marinería de los barcos "...cada día se va aumentando el número de embarcaciones, piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número de marineros".<sup>1193</sup> De estos, muchos procedentes de los Partidos de Tapúa y Costa Abajo, se establecían en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y diestros en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".<sup>1194</sup> De los Pueblos de Misiones, se establecían en la Banda Oriental, "...en los trabajos de Santa Teresa, y demás puestos con que los ocupan, estos, muy lejos de regresarse a sus respectivos Pueblos, se quedan desertados".<sup>1195</sup> Y en Paysandú, más precisamente en el Rincón de San Francisco, Manuel del Cerro Sáenz obtuvo en 1797 como realengas tierras de indios.<sup>1196</sup> En cuanto al Pueblo de Santo Domingo Soriano, si bien se denominaba Pueblo de Indios, por haberse situado en él en sus comienzos un "...corto número de familias de esta naturaleza", en 1779 se redujo "...a una Asamblea o junta de varias naciones entre las que prevalece la Portuguesa, con motivo de las fértiles campañas de ganados".<sup>1197</sup> También los Curas Párrocos se complicaron en la represión de los Pueblos de Indios aún subsistentes. En Santa Fé, el Protector de Naturales, en representación del Pueblo de Indios de Cayastá presentó en 1782 quejas contra el Cura de dicho Pueblo.<sup>1198</sup> En Corrientes, el Protector de Naturales Juan Gregorio Zamudio, en representación del

Pueblo de Itatí, pidió en 1780 la remoción del Cura Miguel Pereira, aparentemente el mismo que dos años después fuera procesado por emparejar a cuarenta (40) mujeres del Pueblo de Santa Lucía.<sup>1199</sup> Y en Buenos Aires, en el Pueblo de Indios del Baradero, sus habitantes también litigaron contra el despojo de sus tierras.<sup>1200</sup>

## **N-XI Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.**

Con la expulsión de los Jesuitas, el proceso de decadencia de las reducciones indígenas se acentuó. Esta situación hizo más necesaria que nunca la fundación de fuertes y fortines. Según el Dr. Mariano Gordaliza,<sup>1201</sup> quien luego fuera Gobernador de Jujuy --en un interesantísimo como ignorado Memorial, redactado en 1804-- las Reducciones indígenas

"...se fundaban a espaldas de los Fuertes, y para entrar a ellas se pasaba por el Fuerte. Así estuvo la [Reducción] de Miraflores en donde hasta el día perseveran los simientos del quadro del Fuerte en frente de la puerta del Colegio. Con los soldados a la puerta los indios son obedientes a quanto se les mande, pero sin ellos que podrá hacer un solo Religioso, ni un Administrador en un despoblado de Christianos y circundado de puros indios? Claro está que nada más que contemplarlos por no exponer su vida".<sup>1202</sup>

La frecuente mudanza que se experimentaba entre los Misioneros, trasladándolos de unos Pueblos a otros, era objeto de reparos por parte de José de Santa Cruz Villavicencio. Estas mudanzas ofrecían no pocos inconvenientes, siendo uno de ellos, a juicio del Capellán Gregorio Francisco, Obispo de La Paz, en carta dirigida en 1785 al Gobernador-Intendente Sebastián de Segurola "...el de que no es regular que con este método se puedan instruir los Religiosos en el idioma propio de cada Pueblo a que se agrega la extrañeza que causará a los Neófitos el berse gobernados por Doctrineros de diversos genios".<sup>1203</sup>

La frecuente mudanza de los Misioneros y el desconocimiento de las lenguas indígenas por parte de los nuevos Administradores hizo aún más crítica la situación de abandono en que yacían las antiguas reducciones.<sup>1204</sup> Cada Reducción se componía

"...de distintas Naciones, y cada Nación tiene distintos idiomas, y estos tan guturales, que no se pueden reducir a alfabeto para escribirlos y aprehenderlos. Si entre las parcialidades de una Reducción no se entienden como entenderían al Administrador ni este como les entenderá? Mas ¿Cómo los Padres podrán predicar a quien no les entiende, y cómo entenderán los Indios a quien no les predica en su Idioma?".<sup>1205</sup>

La necesidad de intérpretes se hizo imprescindible. Pero si bien en los pueblos de indios, donde regía una homogeneidad lingüística, un solo administrador o religioso que dominara el dialecto podía hacerse cargo de la situación con relativo éxito, en las reducciones indígenas, donde la heterogeneidad lingüística era la norma, se requerían multitud de intérpretes. Se preguntaba entonces Gordaliza

"...¿cual era la causa por qué se han reducido con tanta facilidad por un solo Religioso Fr. Francisco del Pilar once Pueblos de Indios Chiriguano en la Frontera de Santa Cruz a Tarija? ¿Cual es la causa por que me dice el Padre Prefecto de Misiones Fr. Estéban Primo Ayala, que mas quiere lidiar con 19 Pueblos nuevos de

Chiriguano, que con solas las dos Reducciones que tiene a su cargo en Nuestra Jurisdicción cuales son los Matacos en el Río Seco, y la de Bejoses en Orán? No es otra cosa que los Chiriguano como hablan un idioma sólo, que lo sabe el Padre Prefecto, lo entienden a él, y el los entiende. Pero como los del Chaco, tienen diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino por Intérpretes, y estos tan perversos que explican lo que quieren".<sup>1206</sup>

La decadencia de las reducciones y las rivalidades étnicas generaron en algunos casos resistencias generalizadas seguidas de crueles matanzas que afectaron la colonización agrícola-ganadera. En el Paraguay, en 1796, el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez, incurrieron en la muerte de 75 indios Mbayás que se hallaban prisioneros.<sup>1207</sup> Con motivo de esta matanza, el Alcalde de Asunción José del Casal y Sanabria fue detenido y remitido con escolta a Montevideo, y en mayo de 1799, con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictamen del Lic. Tomás Antonio Valle, fué absuelto de culpa y cargo.<sup>1208</sup> Según un testimonio de época, dichos indios

"...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguari y Tacuari, y cuñado de José del Casal y Sanabria] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos extremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas".<sup>1209</sup>

Asimismo, este tipo de resistencia se dio en la Banda Oriental. En su estrategia para derrotar a los indios charrúas, escondidos en sus impenetrables montes, el Comandante de Frontera Jorge Pacheco,<sup>1210</sup> sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el triunfo".<sup>1211</sup> El método consistía en asaltar

"...los enemigos después de bien espíados, quienes buscarán su acostumbrado asilo, y entonces veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras tantas bajarán igual distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus frentes dentro, y luego que se hallen así cortados atrás y adelante se practicará el registro por el todo de la Expedición, y habiendo destinado antes en uno y otro costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que giren de continuo en observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo método".<sup>1212</sup>

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí exhibidas, que si bien la inestabilidad social colonial, expuesta en los altibajos de la encomienda, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social --expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

## **Epílogo Sección I-D**

En materia del mercado interno local, y específicamente en relación a los mercados de casas y tierras urbanas (sitios, solares), podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores más tradicionales. Y en materia de tierras rurales, sobre la base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros aquí producidos, si bien la perpetuidad y la consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, habían fortalecido el poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, vulnerando la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí exhibidas, que si bien la inestabilidad social colonial, expuesta en los altibajos de la encomienda, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social -- expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

## **Sección I-E                      Potenciación de una economía de enclave**

De la misma forma como hemos estudiado en las secciones anteriores la naturaleza de la crisis colonial, la índole de la sociedad albergada en su seno, y la articulación económica de un entrepot con su hinterland, en esta cuarta sección habremos de estudiar las relaciones etnológicas de naturaleza económica, tales como la explotación mercantil de un enclave minero. En efecto, en esta sección, volcada a investigar la minería, trato en cuatro (4) capítulos consecutivos: la fase extractiva en la industria minera, la fase del refinado y los cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina, la penuria de agua, azogue y mano de obra en Potosí, y la escasez de medios de vida en la industria minera colonial.

### **Capítulo I-E-15**

#### **Fase extractiva en la industria minera colonial.**

## Índice

- O-I Tradición historiográfica en materia de minería colonial
- O-II Fuentes documentales para la extracción del mineral
- O-III Consumo de mano de obra
- O-IV Costo de producción

## Introducción al Capítulo I-E-15

El objetivo de este trabajo habrá de consumarse analizando las vicisitudes de la rentabilidad minera a partir de las Visitas de Minas y de los Cuadernos Manuales de Lavas, estudiando la explotación mercantil del capital minero sobre la base de las redes comerciales tejidas mediante el crédito notarialmente registrado, y observando la especulación monetaria que las crónicas discusiones acerca de la designación de los conductores del Situado brindan.

### O-I Tradición historiográfica en materia de minería colonial

La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían sido sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entonces tanto las diferentes fases de la producción como el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe distinguir el costo de la saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina al ingenio, del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio. En este trabajo, continuación de otros anteriores,<sup>1213</sup> me he propuesto analizar las causales de la crisis minera en la estructura de costos e inversiones de la fase extractiva de la minería potosina.

El costo de la saca o extracción del metal en las minas y vetas debe haber variado no solo con la cantidad de mano de obra insumida sino también con la cantidad y peso del metal extraído, con la calidad de sus caminos, poteados, enmaderados, arquerías y vetas, con la duración de su bonanza -la más de las veces momentánea o fugaz-, y según que gozaran o no del servicio de mita. Los yacimientos mineros, unos tenían entre la bocamina y los frontones mayor o menor distancia influyendo ello en el consumo de velas y en el monto de la palla o mita que cada indio apiri rendía diariamente. Unos yacimientos tenían, al decir de Cañete en un documento recientemente hallado,

"...caminos mucho más dilatado que otros, y necesitan arquerías de piedra que llaman potos, unas vetas son anchas y blandas, que permiten mayor saca a menor costo [en pólvora y herramientas], y otras son estrechas y duras, que acuden con poco metal con gasto duplicado [en pólvora y herramientas]. Algunas fincas gozan de servicio de mita, y otras no, y aquellas unas tienen más gente, y otras menos. Consiguientemente las labores con mita pagan cincuenta por ciento menos de salario, y tienen cincuenta por ciento más de saca de metales en el cómputo de las tareas, y las minas que no disfrutaban este servicio gozan proporcionalmente menos comodidades que aquellas por el exceso de los jornales que llevan los operarios libres, y por las tareas menores a que se sujetan."<sup>1214</sup>

## **O-II Fuentes Documentales para la extracción del mineral**

A los fines de esta investigación las fuentes primarias a tener en cuenta son las reiteradas Visitas de Minas practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, y los Libros Diario de Trabajos y Gastos. Si bien las Visitas guardan una información valiosísima, su credibilidad y detalle no siempre se mantuvo incólume. A juicio de Buechler (1973) y Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto ritual de inspección, con efectos puramente ceremoniales.<sup>1215</sup> Sin embargo, si observamos la Visita de 1781, veremos que la dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año, transformaron esta institución ocasionalmente en un instrumento de protesta social invaluable.<sup>1216</sup>

Los Visitadores de minas eran designados en un tiempo por los Corregidores respectivos y luego por los Subdelegados, recayendo siempre en "personas distinguidas y de honor". Sin embargo, estas designaciones estuvieron preñadas de intereses mezquinos y relaciones de familiaridad y jerarquía que enturbiaron la objetividad y neutralidad del Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar las vetas descubiertas y corrientes, los rumbos hacia donde corrían, el caudal que rendían o que se esperaba de ellas, la naturaleza y diversidad de los metales, la ley que cada metal rendía, el tipo de beneficio al que se sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las minas e ingenios, los intereses que cada uno poseía, las labores que se traían corrientes, la profundidad y estado en que se hallaban, las imposibilidades de laboreo por inundación y/o filtrado de aguas, y la disposición de poderse habilitar por socavón, según la altura y forma de los cerros.<sup>1217</sup> Más específicamente, estas Visitas debían detallar cuanta distancia había desde cada frontón a la bocamina, qué anchura y capacidad tenían los caminos, cuántos pozos o piques perpendiculares había, cuánto distaban entre sí, el número de puentes con su largo y espesor, qué otras minas se trabajaban en sus límites, con cuáles tenían comunicación, a qué rumbos, y por medio de qué obras. Asimismo, las Visitas debían puntualizar cuántos eran los frontones que se trabajaban en cada mina, "...si las dentradas se hacen por escaleras de madera o sogas, o por las que llaman de patillage, cuantos puentes en virgen, o potos tiene cada labor, cuantas botas de metal saca cada indio en una noche y si aquellas son del tamaño y peso que se observa en esta Villa, amén de la naturaleza y diversidad de los metales entre pacos, negrillos y mulatos".<sup>1218</sup> En el libro Diario de Trabajos y Gastos que prescribían las Visitas

"...se asentarían los empleados permanentes, con dotación semanal, como son los mineros, administradores, arreadores, canchamineros, etc. expresando sus nombres, su estado, su calidad, y su patria, y sucesivamente se pondrán las partidas respectivas de barreteros, apiris, brosisis, pongos, palliris, perdidos, distinguiendo los [indios] cédulas de los mingas, y los salarios que ganaren diariamente. Seguirá el asiento de la saca diaria que hiciere cada individuo, y del jornal que le corresponde con individuación de la naturaleza de los metales, continuando las partidas de los demás gastos tocantes a velas, pólvora, herramientas, y otros, y se pondrá en partida separada la cantidad líquida de metal que quedare útil para el amo después de pallado para reconocer el desperdicio, sumándose después con la misma separación el total de gastos causados en la mina"<sup>1219</sup>

Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la puntualidad con que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran pagados, las horas de trabajo en que se empleaban diariamente, y la puntualidad del azoguero en suministrarles misa, doctrina, y sacramentos por medio de sacerdote efectivo.

Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se disimularan toda suerte de irregularidades tanto en la construcción y mantenimiento de los socavones, como en el tratamiento de la mano de obra empleada en el laboreo. Este fue el caso del Visitador José Manuel Bolaños, "mozo de conducta sumamente reprobada por público ladrón", a quien el Subdelegado José Hermenegildo de la Peña tuvo preso en la cárcel, el cual fue designado por insinuación y empeños del cacique de San Pedro y San Pablo Juan de Dios Helguero. En la opinión del cura de dicha localidad, José de Artajona y Eslava, Bolaños "...sólo ha dirigido a hacerla por lucro, o interés que reporta de ella, y por visitar las minas de sus favorecidos en que se concibe los muchos disimulos que habrá de tener".<sup>1220</sup> Una minuciosa búsqueda en el Archivo Nacional de Sucre, de seguro descubriría una multitud de casos semejantes que podrían poner en tela de juicio la credibilidad del contenido de estas Visitas.

### **O-III El consumo de mano de obra**

El consumo de mano de obra invertido en la fase de saca o extracción era mayor al invertido en la fase del refinado y se reducía al gasto en personal de conducción (mandones) y en indios mitayos y mingas. En cuanto al servicio de Mita, este debe ser considerado como parte del capital constante, aunque algunos lo computan como capital variable. Por el contrario, la mano de obra mingada, es decir aquella constituida por indios "libres" o "voluntarios" que no vivían bajo el mando de curaca alguno, debe ser computada como capital variable propiamente dicho. El gasto en mano de obra, comprendía los sueldos del personal gerencial o mandones, tales como administradores, mayordomos, mineros, canchamineros, y enteradores, que eran los de sueldos más crecidos, así como los salarios de trabajadores tales como barreteros, apiris, brosisis, palliris, pedreros, lacuris, perdidos, y pongos (semaneros).

Entre el personal gerencial los mineros eran una suerte de mayordomos que tenían la responsabilidad de controlar el trabajo de los barreteros y los apiris, midiendo la cantidad y calidad de su producción, ganando por ello \$12 semanales. Al interesar a los mineros en las cuotas partes de los metales que los indios sacaren y molieren, los dueños o arrendatarios de las minas lograban controlar la producción.<sup>1221</sup> Como esta participación incentivaba a los

mineros a elevar las tareas a que eran compelidos los indios, Capoché propuso infructuosamente asignarles un salario fijo. Los canchamineros eran los que llevaban la cuenta del mineral en las canchas o patios de las minas, ganando por ello a razón de ocho pesos semanales.<sup>1222</sup> Finalmente, los capitanes enteradores, designados por los caciques, eran tanto los que respondían por los mitayos ausentes o huidos, como por el incumplimiento de las tareas fijadas.<sup>1223</sup>

Entre el personal trabajador, los barreteros eran los que arrancaban el metal dentro de las galerías. Eran, por lo general, expertos. Trabajaban en compañía de dos personas cada una, y eran mingas o voluntarios. Su jornal era el de ocho reales el día lunes, y de seis reales cada uno de los días restantes.<sup>1224</sup> En cuanto a los apiris,<sup>1225</sup> eran los que acarreaban el metal desde los frontones hasta los cruceros de las minas. Por lo general, eran "indios de cédula", de condición mitaya, aunque también los había que eran mingas. Para poder "...dar abasto a todos los apiris los alcaldes de minas tenían en las Visitas muy en cuenta que hubiere en los frontones de las minas metal suficiente que barretear, para lo cual tenían que revisar periódicamente el estado de los mismos. La penuria de metal en los frontones era parte de las causas de disminución de la producción minera. La escasez de cebo y algodón para confeccionar velas también era causa de la disminución de la producción minera, Por falta de luz, los apiris no alcanzaban a transportar todo el mineral de que eran factibles. A los apiris se les pagaba por el trabajo en la mina a un promedio de cuatro reales por día o cinco pesos cada dos semanas, cifra que dependía, como veremos más luego, del número de pallas o tareas que el apiri realizaba.<sup>1226</sup> Amén de la tarea de transportar el metal desde los frontones hasta los cruceros y desde éstos hasta la bocamina, los apiris eran compelidos una vez que salían con el metal de la mina, a volver a entrar cargados de piedras, mediante las cuales los pongos y sus perdidos construían las defensas dentro de los socavones, defensas que servían para evitar los derrumbes. Tan perjudicial para la producción de plata era este abuso que en la Labor de Cocharcas el Visitador ordenó en 1781 que "...los apiris que salieran cargados de metal de dentro de la Labor no dentrasen vuelta cargados de piedras sino que pongan distintos para esta incumbencia de piedras".<sup>1227</sup> Estos abusos se extendían al resto de la mano de obra. Es así que cuando los barreteros se hallaban ociosos, por carecer los frontones de metal suficiente que barretear, se los obligaba a servir de apiris, a los apiris a servir de brosiris o de pongos, y a los brosiris a servir de palliris. Cañete quiso con su Código poner coto a estos "excesos", pero como es sabido fracasó en su empresa.

Para tener derecho al jornal se señalaba como tarea cierto número de botas de metal o palla que debían sacar diariamente de las labores.<sup>1228</sup> La palla era, en lenguaje tayloriano, una norma de rendimiento del trabajo diario de cada apiri, que buscaba mediante el análisis de tiempos, distancias y movimientos maximizar el tiempo vivo minimizando el tiempo muerto (descansos). El trabajo por pieza o palla en el nivel de la producción minera se habría desarrollado entonces como la alternativa más extendida para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Pero cuanto más alta era la palla más alto era el riesgo de deserciones y huidas, y más necesario era recurrir a métodos coercitivos, que incluso alcanzaban grados de violencia inauditos. Si las Ordenanzas que prohibían las tareas eran observadas, advertía Cañete en un desconocido documento de 1790,

"los indios entrarían a las labores a dormir únicamente, viendo favorecida por la ley su ociosidad natural, y no sacándose entonces ni la décima parte del metal necesario para la molienda de un Ingenio al paso de tener que pagar el azoguero los jornales y los arrendamientos íntegros, es cosa demostrada que el hombre más acaudalado, no podría subsistir en la Azoguería, ni por el término de seis meses".<sup>1229</sup>

A juzgar por otro documento de 1805, la palla promedio consistía en diez ayillos de metal.<sup>1230</sup> Para determinar la palla conveniente a la labor de un apiri se debía calcular el tiempo necesario con que salía cargado de la mina y volvía a llenar su bota. Para ello era preciso medir en varas lineales la distancia que debían andar los apiris desde los frontones hasta los cruceros, y desde estos últimos hasta las canchas o bocaminas, así como los peldaños de las numerosas escalinatas interiores. Si había 200 varas, la palla era de 21 botas, si había 500 varas la palla bajaba a 18 botas, y si la distancia era mayor, la palla bajaba a 16 botas. Se rebajaba entonces, proporcionalmente, "...según se aumenta el número de varas que tiene la veta y según los caminos de ella".<sup>1231</sup> Cada apiri debía sacar de la mina por día una palla o tarea (tequíu en México), que consistía promedio en 28 costales o botas, de cuatro o más arrobas, igual a más de cien libras, por lo que se le pagaba a razón de cuatro reales cada palla.<sup>1232</sup> Pedro Antonio de Azcárate, arrendatario de la mina Sojo exigía de cada mitayo en 1790 un promedio de 24 botas y en 1792 un promedio de 35 botas. Francisco de Paula Sanz redujo esta exigencia a sólo 28 botas.<sup>1233</sup> Para el caso del metal negrilla, por ser éste muy pesado y provocar la queja de los indios apiris, regían medidas especiales. En 1786, el Juez Comisionado mandó medir a cordel la distancia existente entre el crucero y el frontón en la Labor de Socavón del Cerro San Salvador (Guariguari) nombrada San Josef y hallando 200 varas "ordenó a dichos curacas, mineros e indios sacasen cada bota con peso de dos arrobas (50 libras) y que enterasen cuarenta dellas [botas] rebajándoles cinco de las señaladas". Además, para aumentar la producción se le pagaba por encima de esta tasa un tanto por cada bota o costal de metal que sacaren".<sup>1234</sup> Por todo ello, al tiempo de acabar la jornada, se chasqueaban (medían) los enteros de cada apiri con la bota.<sup>1235</sup> Aquellos que no alcanzaban a cubrir la cuota diaria o palla o mita, se les imponían poqueos (multas). Los poqueos, a juicio de Cañete, no eran otra cosa "...que abonos a favor de la azoguería por quiebras de las tareas, de modo que computándose falta de trabajo, todo lo que el indio deja de enterar en las pallas, otro tanto se le rebaja del jornal de la semana".<sup>1236</sup> Si bien antiguamente se cobraban los poqueos con demasiado rigor, al extremo de que la Superintendencia les exigía a los deudores crónicos, llamados indios poquiris, a que subieran al cerro a la semana siguiente para completar su tanda, a fines del siglo XVIII, según relata Cañete, dicho cobro se moderó, pues "...enterando el indio cuatro pallas, no se le exige poqueo".<sup>1237</sup> Aquellos indios poquiris que no alcanzaban a redimir sus deudas tampoco podían después de acabada la mita, satisfacer sus tributos, siendo esta, en opinión de Cañete, "la causa general de las miserias de estos hombres", y a juicio de Fisher (1977), la causa de su deserción de la mita y su conversión en mingas.<sup>1238</sup>

En cuanto a los brosiris, estos eran los que separaban en los cruceros de las minas el metal útil del quebrado en los frontones para beneficio de lo que llamaban caja o desmonte, y para una vez despedazados en pequeñas porciones, poderlos sacar en las botas con comodidad. En oportunidades trabajaban en compañías de a dos. En un documento que hallé en la serie de Hacienda del AGN se establece que en 1805 a los brosiris cada palla de diez ayillos les era pagada a cinco reales, por lo que en siete pallas semanales cobraba \$4 y 3 reales. En cuanto a los lacuris, estos eran aquellos que acarreaban la caja del metal. Cada palla de diez ayillos les era pagada a cuatro reales, por lo que en siete pallas semanales cobraba \$3 y 4 reales. Con respecto a los palliris, estos eran los que mediante combas pallaban o quebraban durante el día el metal que los apiris hubieren sacado a la cancha, lugar próximo fuera de la mina. Cada palla de diez ayillos era pagada al palliri a ocho reales, por lo que cobraba \$3 y 2 reales por semana. Con relación a los pongos o semaneros eran los porteros o indios prácticos en potear, tarea esta última en la que ganaban nueve pesos semanales y que consistía en construir paredes de piedra en seco, para lo cual contaban con indios a sus órdenes en calidad de meros operarios, llamados perdidos.<sup>1239</sup> Cañete llegó a

afirmar de los pongos que eran los arquitectos y geómetras de las minas.<sup>1240</sup> Finalmente, los cumuri eran aquellos responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la tierra (llamas) los ayillos de metal a los ingenios, guinados (acomodados) en costales de lana de 4 arrobas y 5 libras, a razón de dos costales por llama.<sup>1241</sup> El flete del cumuri alcanzaba a dos pesos por cada ayillo de 150 arrobas.<sup>1242</sup> Dichos cumuri estaban dirigidos por un arreador que ganaba a razón de seis pesos semanales. Por lo general, se les pagaba a todos los indios "en plata y mano propia" pero también en especie. La más común de las especies era el mollete que se efectivizaba en las pulperías.

La demanda de mano de obra en cada una de las tareas de una labor variaba de acuerdo a razones distintas. La demanda de barreteros variaba con la calidad de la veta. Según Capoché (1585) no podían trabajar juntos en el testero del socavón más que dos barreteros. En México, Bakewell (1977) nos cuenta que a comienzos del siglo XVII había labores que trabajaban con 30 o 40 barreteros.<sup>1243</sup> En Potosí, las labores que alcanzaban el record de barreteros fueron las administradas por Carlos Hereña y Nicolás Urxainqui, conocidas bajo los nombres de El Carmen y San Miguel, las que en 1778 emplean a 60 barreteros y en 1784 y 1786 emplean 50 barreteros cada una, produciendo asimismo el record de 100, 80, y 120 ayillos de metal pallaco semanales respectivamente, alcanzando el máximo en 1787 con 130 ayillos de metal. Por el contrario, cuando escaseaba la gente de mita, mientras el grueso de la misma amparaba (cubría) una labor, en la otra labor del mismo azoguero uno o dos barreteros "...ba trabajando lentamente bajo la inspección del Minero para evitar derrumbes, o estrañas introducciones en aquellas pertenencias".<sup>1244</sup>

La necesidad de apiris fluctuaba a su vez con la cantidad y peso del metal existente en los frontones y la distancia de los mismos respecto de las bocaminas y sus canchas. El record de apiris en Potosí, fue alcanzado por la labor del Carmen, la cual llegó a contar con 225 mitayos en 1778 y 131 mitayos en 1781, doblándose en 1786 hasta alcanzar a 281 mitayos, que transportaban 120 ayillos de metal pallaco semanales. La demanda de brosis y palliris oscilaba con la cantidad de broza, granza, y llampo existente en los frontones y las canchas. Las labores del Carmen y Santa María alcanzaron a emplear 20 brosis cada una en 1781 y 1786 respectivamente. La necesidad de pongos y perdidos también variaba con el estado de los caminos internos de la mina y la calidad del poteado (construcción de paredes de piedra en seco) existente.

La población minera en la fase extractiva se componía también de una proporción desigual de indios mitayos e indios mingas. Si bien la proporción entre mitayos y mingas en cada labor no estaba fijada por ley alguna, la tendencia vigente favorecía -con gran pesar de los azogueros- una creciente caída relativa de la población mitaya y un gradual crecimiento de la población mingada. El número de labores donde la proporción de mingas sobre mitayos aumenta respecto del número de labores donde la proporción disminuye era desigual. De 16 labores que cuentan para 1781 con la información completa al respecto, en diez labores el número de mingas supera al número de mitayos a un promedio de cinco mingas por cada mitayo y en seis labores el número de mitayos supera al número de mingas a un promedio de 1,7 mitayos por cada minga, lo cual da una tasa promedio de 3,4 mingas por cada mitayo. Seis años más tarde, en 1786, trece labores de las que se cuenta con información revelan una disminución de esta proporción de 3,4 mingas por mitayo en 1781 a 2,5 mingas por cada mitayo. Esta disminución parecería contrariar la tendencia expresada, pero si tenemos en cuenta que en 1781 las sublevaciones indígenas provocaron un alza del ausentismo mitayo, estas cifras no debieran sorprendernos. La tendencia de un gradual crecimiento de la población mingada hizo posible a su vez la existencia de labores operadas

sin mita alguna. En los casos de las labores Santísima Trinidad y Rosario, ubicadas en el Cerro de San Salvador y administradas por Vicente Rúa, no se le conocía en 1781 asignación de indios mitayos. Este fue el caso también de la labor Cotamito que operaba en 1781 por cuenta de Fermín Prudencio Pérez.

La relativa incapacidad de la clase azoguera para incorporar tecnología más avanzada -a diferencia de la minería mexicana donde la pesada tarea de los apiris se vio auxiliada por la utilización de caballerías y la instalación de malacates en la boca de las minas- incidió para que el peso del factor trabajo en la productividad minera, y por consiguiente en los costos de producción, fuese considerable. Computando el consumo de fuerza de trabajo se comprueba que el aumento de la producción de metal en el caso de la labor del Carmen de 80 a 120 ayillos podría haber obedecido al incremento de mano de obra de 131 indios de cédula en 1781 a 281 en 1786, y de 40 a 50 barreteros. En cambio, de las ocho labores que redujeron su producción de metal dos de ellas fueron las más significativas. La labor Pimentel redujo, entre 1781 y 1786, su producción de 90 a 16 ayillos. En esta reducción habría jugado algún rol la disminución del consumo de trabajo vivo, de 27 indios de cédula a 10 indios. La labor Santa Gertrudis también redujo su producción de 40 ayillos semanales a 25. Esta reducción se debió probablemente a la disminución de indios de cédula de 13 a 10 y a la disminución de indios barreteros de 24 a 20.

También se observa una profunda desigualdad en la provisión de mano de obra mitaya entre yacimiento y yacimiento. Mientras unas labores tienen en 1801 hasta 34 indios, otras tienen 22 indios, y las demás llegan -a juicio de Cañete en un desconocido Informe elevado al Virrey del Pino- escasamente a este último número, desde cinco indios que es el caso mínimo,

"...de modo que siendo indispensable ocupar a un tiempo los operarios destinados al trabajo semanal en sus respectivas puntas o cuadrillas y no admitir cada amparo sino diez hombres de mita, dos de ellos en clase de brosirís, y ocho en el de apiris, es menester multiplicar los amparos a proporción de las decurias de cada repartimiento. Es decir, que donde hubieron diez indios semaneros basta un solo amparo, pero en pasando conviene dar otro amparo más, aunque no lleguen al número de 20, y de ay para arriba es preciso conceder otro tercer amparo sin pasar de este cómputo".<sup>1245</sup>

Esta desigualdad se manifestaba también en el número de puntas o cuadrillas en que se dividía la gruesa de indios mitayos. De 17 labores con que se cuenta con información para 1781, nueve labores respetaban la división legal en tres puntas y ocho labores dividían sus gruesas de indios mitayos en dos puntas, lo cual nos da una tasa promedio de dos puntas y media por gruesa. Y de 16 labores con que se cuenta con información para octubre de 1786 una docena de labores cumplía con lo establecido por las Ordenanzas, y cuatro labores dividían las gruesas de mitayos que se les asignaban en sólo dos puntas, lo cual elevaba la tasa promedio en dos décimas de porcentaje de 2,5 para agosto de 1781 a 2,7 para octubre de 1786.

Si bien para la gruesa de un ingenio con mita era indispensable que el azoguero interesado hubiere mantenido a costa de su dinero, por lo menos dos o tres labores, la una con mita, y las demás labores con parte de ella más el trabajo de operarios libres, o mingas, algunos azogueros se excedían, con gran escándalo y temor de sus colegas, llegando a tener hasta cinco, seis, o más labores.

A diferencia del valor de los ingenios con mita analizado en otro trabajo, el valor de las minas vendidas por estaca e independientemente de los ingenios fluctuaba más bruscamente, debido a la extrema aleatoriedad de la explotación minera propiamente dicha vis a vis la explotación de un ingenio de moler y refinar metales. Cañete (1952) nos detalla que en la década del 80 se vendió una estaca-mina del Rey en \$14.000, otra del Asiento de Aullagas, en la Provincia de Chayanta a un vecino llamado Antonio Almandos en \$600, y otra comprada por el Capitán José de Andrés Sanz en \$1000 la vendió más luego en \$21.000.<sup>1246</sup> Como consecuencia de la inflación desatada en el precio de los yacimientos se desencadenó una competencia tal entre los mineros que en muchos casos lindó con el delito. Oportunamente vimos, en ocasión de estudiar el fenómeno de la escasez de agua, el efecto migratorio que esto causaba hacia los asientos mineros existentes en la periferia de Potosí.<sup>1247</sup>

Por último, amén de mitayos y mingas proliferaban en los yacimientos los llamados buscas, buscones, o pallaqueros (pirquineros en Chile), que consistían en aquellos indios o mestizos que

"...con permiso y anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del sábado, entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por mitad entre el dueño y el trabajador, con cuyo auxilio, que es a más de su jornal diario, no sólo se consiguen con abundancia operarios, sino que se evitan los ladrones, que con el nombre de capchas hacen muchos destrozos en las minas"<sup>1248</sup>

#### **O-IV El costo de producción**

El costo de la saca del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases de su extracción (barroteado, mudanza, broseado, pallado, etc.), el costo del personal gerencial (mineros, canchamineros), y los gastos en pólvora con que romper los frontones; en cebo y algodón con que confeccionar las velas; y en acero con que fabricar las herramientas. El costo de la saca comprendía también la amortización de los gastos emprendidos con la limpieza, aizamiento (enmaderado), y poteado del socavón. Respecto del costo de los insumos devengados en la fase extractiva hemos podido establecer una regla cuantitativa que correlaciona en forma directa el número de cajones de metal producido, con el monto de los jornales y las onzas de pólvora, acero, sebo y algodón consumidas en producir dichos cajones de metal. Del extracto de los gastos insumidos en el lavoreo de la Mina Soterrana sita en el Cerro de Ichocollo hemos tomado las cifras del dinero gastado en el pago de jornales y demás gastos correspondientes a las diez primeras semanas del año 1804 y la hemos dividido por el número de cajones de metal sin incorporar producido en dicho lapso. Esta operación nos dio un promedio semanal por cajón de metal sin incorporar, de 9 1/2 pesos insumidos en jornales (que corresponden a cuatro indios apiris), 1 1/2 real en 1 1/2 onza de acero (a real la onza), 4/10 de real en 10 onzas de pólvora (a 25 onzas el real), 3 reales en 3 1/2 libras de sebo (a casi un real cada libra), y 2/10 de real en 1 1/2 onza de algodón (a ocho onzas el real).<sup>1249</sup>

De igual manera, de las ocho Visitas de ingenio estudiadas, hemos tomado el número de cajones de metal sin incorporar procedentes de los yacimientos mineros correspondientes a cada semana y lo hemos dividido por el número de cajones de metal refinado producido en los ingenios en dicho lapso. Esta operación nos dio un máximo en 1781 en el Ingenio San Pedro de un cajón refinado por cada 5 1/3 de cajones sin incorporar, y un mínimo en 1787 en el Ingenio Chaupi de un cajón refinado por cada 1 3/4

de cajón sin incorporar, siendo el promedio el de  $3 \frac{3}{4}$  cajones sin incorporar por un cajón refinado. De ahí que concluyamos que para producir un cajón de metal refinado serían precisas  $3 \frac{3}{4}$  veces los insumos requeridos para producir un cajón de metal sin incorporar. En otras palabras, para producir un cajón refinado eran necesarios \$35,6 insumidos en jornales,  $5 \frac{2}{3}$  reales insumidos en  $5 \frac{2}{3}$  onzas de acero (a real la onza),  $1 \frac{1}{2}$  reales insumidos en  $2 \frac{1}{3}$  libras de pólvora (a 25 onzas el real),  $11 \frac{1}{4}$  reales insumidos en 13,1 libras de sebo (a casi un real cada libra), y  $\frac{3}{4}$  de real insumidos en  $5 \frac{2}{3}$  onzas de algodón (a 8 onzas el real). La dificultad que ofrecen estos cálculos estriba en que los pesos insumidos en jornales en 1804 lo eran en gran parte en indios mingas ( $2 \frac{1}{4}$ ), cuyo jornal alcanzaba los 34 reales semanales, y no en indios mitayos. De aquí que la proporción de \$9  $\frac{1}{2}$  por cajón sin incorporar no podría proyectarse retrospectivamente a años cuando la explotación minera se basaba fundamentalmente en trabajo mitayo. En consecuencia, el cálculo deberá practicarse sobre la base del número y calidad de los indios insumidos en el trabajo minero y no en el monto de los jornales devengados. Si tenemos en cuenta entonces, que si para 1804 los \$9  $\frac{1}{2}$  semanales por cajón sin incorporar insumidos en mano de obra minera correspondían a  $2 \frac{1}{4}$  indios mingas, en la década de 1780  $2 \frac{1}{4}$  indios mitayos habrían devengado sólo \$4 semanales por cajón sin incorporar.

El cálculo del gasto en las herramientas precisas para el laboreo (barretas, combas, llaucanas) podía seguirse de dos maneras distintas. O bien se calculaba a partir del costo del acero que se gastaba en confeccionar dichas herramientas, como lo acabamos de practicar. O bien lo calculamos sobre la base del valor de mercado de cada una de dichas herramientas. Por éste último método totalizábamos un valor promedio de \$100 por yacimiento. La dificultad de este método estriba en que como cada herramienta poseía una diferente extensión de su período de vida útil, el cálculo del costo de reposición se hacía muy escabroso. Si tenemos en cuenta que semanalmente se consumía en herramientas para el laboreo de una mina  $1 \frac{1}{2}$  onzas de acero por cajón de metal sin incorporar, concluimos que para producir veinte cajones de metal, que es lo mínimo que puede operar un ingenio para iniciar sus operaciones, se consumía semanalmente para el laboreo de la mina dos libras de acero en herramientas. Y si tenemos en cuenta que una comba de enguisar pesaba 12 libras, una barreta 18 libras, un azadón grande 10 libras y una famulla 8 libras, concluimos que 20 cajones de metal consumían una comba cada 6 semanas, o una barreta cada 9 semanas, o un azadón cada 5 semanas, o una famulla cada 4 semanas.

El cálculo del gasto en velas puede seguirse también de dos maneras distintas. O bien lo calculamos a partir del gasto en apiris teniendo en cuenta que cada apiri consume entre 5 y 6 velas semanales y que por ende 3 apiris consumían un mayto de velas por semana, o bien lo calculamos sumando el gasto semanal en sebo y algodón. Por el primer método obtendremos cifras que doblan las obtenidas por el segundo método. Esta diferencia es razonable si consideramos que algunos yacimientos que no confeccionaban sus propias velas las compraban en maytos a proveedores, que cargaban un 100% de costo por la hechura de las mismas.

En cuanto a la amortización de los gastos implicados en la limpieza, desagüe, aizamiento, y poteado del socavón carecemos de la información pertinente aunque presumimos que debe haber variado notablemente de mina en mina. En suma, los gastos de saca o extracción (columna IV de Tabla I) totalizaban un promedio de 575 pesos en cada uno de los 12 ingenios estudiados, que a un promedio de \$15 por cajón alcanzaba a absorber alrededor del 50% de los costos totales de cada cajón de metal refinado producido semanalmente. Mas si analizamos los gastos de saca en particular para cada uno de los

ingenios estudiados en la Tabla I, observaremos que las diferencias entre los mismos oscilaban notoriamente. En el caso del ingenio Pampa, arrendado por Manuel Ortega, el costo de la saca alcanzó en 1784 la cota más alta, totalizando \$19 por cajón o el 47% de los costos totales del ingenio (columnas V y VI de Tabla I). Por el contrario, en el caso del ingenio Laguacaio, del Marqués de Casa Palacio, el gasto en extracción tocó en 1791 el piso más bajo, totalizando sólo \$7 por cajón o el 44% de los costos totales del ingenio. Esta abrumadora diferencia en el costo entre una mina y otra confirma la relativa irrelevancia que la plusvalía humana poseía en esta etapa de la producción minera frente a otros gastos tales como el poteado, aizamiento (enmaderado), y desagüe de los yacimientos, la pericia de los barreteros en ahorrar gastos en pólvora, y de los pongos en ahorrar gastos en madera, y la capacidad gerencial de integrar la explotación minera con otros giros económicos que les proveían los insumos claves a precio de costo.

A diferencia de los ingenios donde el mantenimiento y la reparación no eran tan relevantes, la vida física útil de las instalaciones mineras podía prolongarse en el tiempo mediante un mantenimiento y una reparación respetables. Abandonar la mina significaba que en poco tiempo se derrumbaba e inutilizaba -volviéndose ciega, hundida o aguada- por el ingente costo que acarrearía el volver a limpiarla, desaguarla, potearla, y ponerla en estado de elaboración. Esto ocurría, al decir de Manuel José Vélez, aún cuando

"...el dueño de ellas no haya sufrido el común efecto de que algún vecino le haya desfigurado sus intereses, taqueando sus caminos, y abierto otros para internarlos en los suyos...o como ha sucedido aún en minas de la mayor consideración de este propio Cerro que ayzadas o por malicia [se confunden de tal suerte que ninguno] ha podido encontrarse con ellas a pesar de que no hay azoguero que no haya emprendido su busca".<sup>1250</sup>

Es decir, los costos futuros en que se incurre en relación con la instalación minera propiamente dicha son los costos de operación y mantenimiento, que incluyen el desagüe, el poteado, y la pirquería. Estas tareas comprendían la introducción de piedras en las minas, por parte de los mismos indios que extraían el metal de los frontones. Por lo general, durante el estado de refacción, las labores dejaban de producir. La labor conocida como La Cueva, al ser visitada en 1781, denunció estar "...en diligencia y no sacar metal ninguno". En la labor de Pampa Oruro, de Nicolás Urxainqui, no se sacaba en 1781 "...cosa alguna porque se está en el desagüe, a descubrir una veta de negrillos". Y en la labor del Carmen, de Bartolomé Fortún, "...se sacan dos ayillos de metal porque están en la diligencia de limpiar unos guecos". Cinco años después, esta misma labor alcanzó el record de 120 ayillos de metal semanales. Es también la labor que más pólvora y velas llegó a insumir, alcanzando a emplear además 281 indios.

Dado que el costo original de la mina es fijo, y los únicos costos futuros son los de operación y mantenimiento, se estaría en condiciones de determinar las circunstancias en que se estimaría que la mina es improductiva y que por lo tanto debía ser abandonada. Además, no siempre las labores ofrecían condiciones de seguridad a los trabajadores. Era obligación de los Visitadores observar cuanta falla pudiera registrarse. Sin embargo, pocos lo hacían, salvo en tiempos de la rebelión Tupamara. La labor de la Moladera, de Antonio de Almandóz "...toda ella estaba [al ser visitada en 1781] segura, menos el Alto del Pampón que está peligroso, aunque tiene potos en el Planpero...trabajando o moviendo el alto caen lienzos muy grandes". Observando el peligro, el Visitador "hizo que se les notificara [a los mineros y canchamineros], que en aquellos paraxes del Pampón no

pongan trabajo alguno...que suspendan la gente interín que no se potee...y de contravenir bajen los dichos mineros presos".<sup>1251</sup>

Los azogueros combinaban la extracción extensiva de metales, con la explotación intensiva de capital y mano de obra. Con una lógica maximizadora de sus ganancias, los azogueros aumentaban la asignación de recursos (mano de obra, sal, cal, plomo, etc.) en la medida que se incrementaba la ley del mineral extraído y que se aproximaba la estación del verano, período en el cual las ruedas de los molinos trabajaban a full, y la harina en los buitrones maduraba más velozmente. Esta habilidad gerencial los llevaba a integrar y a completar todo el circuito productivo, abarcando desde la extracción hasta el desazogado de las piñas de plata, pues de este modo obtenían una ganancia acorde a la rentabilidad diferenciada de sus minas, de distinta calidad y localización. La diferencia en los costos de extracción o saca, entre yacimientos distintos, se acentuaba con la calidad de la limpieza, del broseado, y del pallado del metal, practicado por los brosirís y las pallirís en las canchas y cruceros.

También se acentuaba la diferencia en los costos de extracción cuando la explotación controlaba otras actividades que las proveían de insumos estratégicos. Luis de Orueta era a fines del siglo XVIII el azoguero más bien parado del Gremio, por contar con fondos adquiridos en otros giros, que le habían proporcionado una economía y ahorros no fáciles a los demás, como fueron

"...el abasto de maderas, sal, herramientas, y demás utensilios precisos a la explotación, molienda, y beneficios en tiempos oportunos y por consiguiente a precios mas cómodos, lo que no pueden verificar los demás que no tienen fondos para ello por lo que es consiguiente que cada uno de estos ha tenido aún más pérdida en el común giro de dos cabezas en que los más llevan su trabajo".<sup>1252</sup>

En el caso de los azogueros, que poseían recursos tales como haciendas y almacenes, el pago a los indios de minas e ingenios se realizaba por medio de productos (molletes, charqui, bayeta, coca, chuño, etc.). Esta circunstancia no permitía, en la sagaz observación que Mitre (1981) hiciera para la minería del siglo XIX, estimar el precio efectivo de los artículos consignados en los gastos de la empresa y que, de hecho, fueron producidos o "vendidos" por el complejo hacienda-mina.<sup>1253</sup> Este fue el caso del malogrado Juan de Dios Rodríguez, quien fuera en Oruro dueño no sólo de los Minerales de Poopó, Antequera, y Abicaya, y de tres ingenios en las Riberas de Sora Sora y Sepolturas, sino también dueño de una estancia nombrada Paz, que rendía más de 500 pesos anuales.<sup>1254</sup> También fué el caso de Luis de Orueta y Juan Bautista Jáuregui, quienes poseían las haciendas de Azángari, Totoras, y Oyanumen, en Tarapaya, por compra que en 1800 y 1803 hicieron a María Antonia Portales y su hijo José Antonio Arriaga.<sup>1255</sup> Asimismo, el Conde de Casa Real de Moneda poseía las haciendas de Conapaya y San Pedro de Mataka, y llegó a vender a Alexandro Rodríguez la hacienda nombrada Orcococha, conjuntamente con un ingenio de moler de metales construido en ella.<sup>1256</sup> El albacea de Juan José Navarro vende a Nicolás Urxainqui la hacienda-ingenio nombrada Guarni, sita en la Doctrina de Tarapaya.<sup>1257</sup> Finalmente, en Guantajaya los mineros eran también los hacendados de la región.<sup>1258</sup>

En regiones mineras alejadas de las Riberas donde se beneficiaban los metales existían métodos extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral. Entre estos métodos abundaban las usurpaciones, los despojos, las intimidaciones, las amenazas,

y las argucias judiciales. El caso más paradigmático fue el que protagonizara Don Francisco de Amaral, oriundo del reino de Portugal, dueño del Ingenio Palca y Minero en el Cerro de Aullagas, Provincia de Chayanta, quién aviado en 1778 por el Conde de Casa Real de Moneda no sólo habría sustraído una mina de 60 varas,

"...sino aún 19 estacas minas que sin otro título que su ambición ha convertido en propia sustancia en la veta nombrada Colquechaca...sin que tenga términos su insaciable codicia en perjuicio de otros mineros fieles vasallos del soberano...,con un arrojo reprehensible y visible descaro hace poner las barretas con gruesa de gente necesaria en las cuadras o intereses propios de estos miserables fieles vasallos del Rey confiado en el manifiesto patrocinio, y conocido valor superior que disfruta..."<sup>1259</sup>

Habiéndose iniciado un litigio judicial, el objetivo de Amaral era demorar y dilatar la resolución del asunto, y así aprovecharse, entre tanto, de todos los intereses ajenos mediante todo tipo de métodos,

"...hauérseles introducido debajo o planes [lo mas hondo] a los interesados inmediatos a la veta de Colquechaca que tienen sus minas en la parte superior que se llama J M y J y les ha extraído sus ricos caudales [alcanzando a la suma de \$75.000], no sólo al más antiguo que es Don Estéban de Amezagaray, sino al sucesivo en dirección de Cerro arriba Don Francisco de Gumucio..."<sup>1260</sup>

En la tarea de lograr sus fines Amaral se valía de bandidos armados

"...destinando para la saca de estos metales a más de la gente necesaria a unos mozos foragidos, y destinados para aventurar cualquier lance por más lastimoso que pueda ofrecerse; en este concepto los interesados arredrados, y siendo sujetos recomendables por su conducta, procuran evitar toda proporción de que pueda resultar muertes, aunque sea con dispendio y menoscabo de sus caudales",<sup>1261</sup>

Estos fascinerosos acudían a intimidaciones de todo tipo

"...con la expresión de que no tienen que perder, como acaeció en un fulano Calvo, que en presencia de este mismo Comisionado [Estevan de Isasa] la vertió con la amenaza de que a Don Manuel Alvarez minero de este Cerro le quitaría la vida...El compañero de Calvo y canchaminero del mismo Amaral nominado Sanjurjo, con la gente que tiene destinada con armas en lo interior de la mina...pretendió con asechanzas quitarle la vida al Juez de Comisión Don Joaquín Montenegro y a los demás que lo acompañaban..."<sup>1262</sup>

Pero lejos de un condigno castigo, y sin el más leve apercibimiento, mandó la Real Audiencia Territorial

"...se guardase perpetuo silencio, cuio procedimiento lo tiene en extremo grado insolentado, y amedrentados los pobres mineros no encuentran asilo adonde recurrir, para contener sus desafueros y atentados".<sup>1263</sup>

Entre los métodos extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral los mineros se valían también en sus litigios ante los tribunales de argucias judiciales de todo tipo, tales como inhibiciones, recusaciones, y cambio de fuero. Hallándose Amaral

descontento con las providencias libradas por el Corregidor se las arregló en su condición de pariente de Don Ramón de Rivera, Oidor de la Real Audiencia, confidente a su vez del Presidente de la Real Audiencia Don Joseph López Lisperguer, suegro del Conde de Casa Real de Moneda, para hacer que en Charcas se nombrara en su lugar a parientes de parientes,

"...logró arrastrarle el conocimiento de todas sus causas a la Real Audiencia Territorial, donde para la expresión de agravios pidió se le eximiese e inhibiese en todas ellas que fuesen pertenecientes a él, y a toda su familia, y se le nombrase un Juez con especioso título de Conservador".<sup>1264</sup>

Elegido como Juez Conservador Don José Arias, hijo del Dr.Dn. Joseph de Arias, Abogado de todos los asuntos de Amaral,

"...a quien [Amaral] lo ha mantenido en la cualidad de comensal y asalariado en su propio Ingenio llamado la Palca, situado en la Rivera de este Cerro de Aullagas...mas con el concepto general que se tiene de que mantiene [Amaral] relación de parentesco con Don Ramón de Ribera, y por consiguiente sostenido y protegido dicho reo por su confidente Dn. Joseph López [Lisperguer][suegro del Conde de Casa Real de Moneda], quienes a una conformidad consultan a beneficio de Amaral, lo que es bien constante, y sin embargo de ser notorio, no hay quien se atreva a exponerlo, por no contraer la venganza, y ser víctima de la pasión de dos Ministros Oidores".<sup>1265</sup>

En el nombramiento que recayó en este Juez Conservador

"...logró Amaral a costa de sus reprobados arbitrios despojar a su Corregidor integro y justificado de su jurisdicción privativa, o mejor diré consiguió cuanto le sugirió su extremada avaricia, con este medio escandaloso, y tan aborrecido en derecho por ser en odio de la real jurisdicción, confundió unas usurpaciones tan claras practicadas, no sólo contra el Real Haber, sino contra la comunidad de los Mineros, y en especial de los particulares intereses del finado Joseph de Astuena [Dueño de una mina en el Cerro de Aullagas, Provincia de Oruro].<sup>1266</sup>

Finalmente, la inversión de capital fijo en la fase extractiva se reflejaba necesariamente en el alza o baja de la ley del metal. A mayor inversión en el trabajo de profundizar el socavón aumentaba la ley del mineral, debido -al decir de Cañete-a la naturaleza "trastornada" de su estructura geológica. El costo de la saca de cada cajón de metal subió en Potosí a fines del siglo XVIII un 25%, de \$15 en la década del 70 y 80 a un promedio de \$20 en 1802. Estos crecientes costos no fueron en vano y se correspondieron con un incremento en la ley del mineral de dos marcos por cajón de metal producido.<sup>1267</sup> En efecto, Cañete (1802) confiesa que si bien al tiempo de formarse el Reglamento del Banco de San Carlos (1780), se trabajaba sólo con metales pallacos que a lo sumo daban cuatro marcos semanales por cajón, a comienzos de siglo se trabajaban metales de labor con la ley común de seis marcos por cajón.<sup>1268</sup> Más aún, en la réplica que Cañete escribiera contra Villava, pero que firmara Francisco de Paula Sanz, llega a afirmar que

"Las minas están hoy en una profundidad tan desmedida que si antes cuatro apiris y uno o dos barreteros podían sacar ocho o diez cajones a la semana de una labor, hoy, con quince o veinte barreteros y con cincuenta apiris, apenas pueden igualar

esta saca. Si antes, por el auxilio de los payacos llevaban sin necesidad de apiris 25, 30 y aún 35 cajones de gruesa semanal para su beneficio, hoy necesitan el número dicho de apiris [50], de muchos más barreteros y muchas mas manos para poder llevar 18 o 20 cajones, cuando más".<sup>1269</sup>

De ahí que a diferencia de lo afirmado por la literatura más reciente, la causa de los cortos márgenes de ganancia de la producción minera habría obedecido no a una baja de la ley del mineral sino a un incremento desproporcionado de la población mingada por sobre la población mitaya.<sup>1270</sup>

El costo de la limpieza del metal, de chumbes y malezas, y el costo del broseado y pallado del metal extraído de la mina también se reflejaba en el alza o baja de la ley del metal. En Oruro, cuando se enviaban los metales al ingenio del pueblo de Sora Sora, bien limpios de chumbes y malezas y bien pallados, la ley del metal aumentaba. Cuando Ildefonso Osio, beneficiador de los ingenios de Oruro comenzó a lavar conjuntamente los metales de las minas Diez y Catorce, propiedad de Diego Flores, la ley del metal aumentó porque "...no llegando a los diez marcos la broza, y a los seis marcos los llampos...la mina Catorce está dando unidamente diez marcos por cajón, sin embargo de que los metales de la mina Diez no vienen tan limpios como corresponde".<sup>1271</sup>

## Glosario

aizamiento= enmaderado de la mina

amparar= cubrir una labor

apiri= indio transportador

brosiris=

buscas o buscones= o pallaqueros (pirquineros en Chile), indios o mestizos que "...con permiso y anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del sábado, entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por mitad entre el dueño y el trabajador, con cuyo auxilio, que es a más de su jornal diario, no sólo se consiguen con abundancia operarios, sino que se evitan los ladrones, que con el nombre de capchas hacen muchos destrozos en las minas"<sup>1272</sup>

cumuri= aquellos indios responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la tierra (llamas) los ayillos de metal a los ingenios,

charqui=

chasquear= medir

chumbe=

chuño=

escaleras de patillaje= de madera o soga

famullas= instrumento de acero como escoplo que sólo se diferenciaba en que tenía la punta redonda y de la cual se ayudaban los indios con su martillo.

granza=

gruesa=

guinar= acomodar

hechura= confección

lacuris=

lampas=

llampo=

llaucanas= barreta pequeña para uso del cateador

maytos de velas= cada mayto de vela comprendía 16 candelas  
 mollete= galleta  
 palla= monto de metal producido que cada indio rendía diariamente  
 pallaqueros= buscas  
 palliris=  
 perdidos= operarios de los indios porteros  
 pedreros=  
 pirquería=  
 poqueos= multas a favor de la azoguería por quiebras de las tareas, de modo que computándose falta de trabajo, todo lo que el indio deja de enterar en las pallas, otro tanto se le rebaja del jornal de la semana".<sup>1273</sup>  
 poquiris= indios que eran deudores crónicos a la azoguería  
 pongos=  
 porteros= indios prácticos en potear, tarea esta última en la que ganaban nueve pesos semanales y que consistía en construir paredes de piedra en seco, para lo cual contaban con indios a sus órdenes en calidad de meros operarios, llamados perdidos.<sup>1274</sup>  
 potos= arquerías de piedra  
 punta=  
 taquear=  
 yanapacos=

## Capítulo I-E-16

### **Fase del refinado y cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina.**

#### Índice

- P-I Fuentes documentales para el refinado del metal
- P-II Costos de baja o transporte
- P-III Molienda o morterado
- P-IV Repaso.

#### **Introducción del capítulo I-E-16**

El costo de las diversas etapas del beneficio del mineral (baja, molienda, repaso, lavado, y desazogado), entre ingenio e ingenio, variaba no sólo con la cantidad de la mano de obra insumida, tal como lo plantean algunos autores, sino también con diversos otros factores tales como la distancia que el ingenio tenía con los yacimientos, la abundancia o escasez de agua en las lagunas, la calidad del metal y de las instalaciones para molerlo, la calidad del repaso que los indios *repasiris* le dieran a la harina, la calidad de la amalgama que los ensayadores ordenaren, el monto y precio de los insumos requeridos para su beneficio, la proximidad de canchas, tambos, y bodegones donde proveerse de bastimentos, la cercanía a depósitos de sal, cal, y madera, el monto que de las reservas de materias primas mantenía, el número de puntas (equipos de semana) con que la gruesa (totalidad) de indios fuese repartida, y según que gozaren o no del servicio de mita. Por

consiguiente, el costo del beneficio del metal variaba con los auxilios y fiados para la adquisición del azogue y de los medios de producción (ruedas, ejes, almadanetas) imprescindibles para el beneficio del metal. Generalmente, se estimaba la importancia que un ingenio tenía en las diversas tareas del beneficio del mineral por el número y calidad de las cabezas, ruedas, almadanetas, sedazos, hornos, y buitrones que cada ingenio poseía, ya que esto era la medida de su capacidad de refinar plata en bruto.

Como el capital produce más plusvalía cuanto más rápida es su rotación, la reducción de la duración del ciclo de circulación del capital minero (el lavado solía durar cinco semanas) garantizaba contrarrestar el descenso de la tasa de beneficio. De ahí también, el porqué del interés de algunos azogueros de introducir ruedas de molino con más almadanetas, o de mayor anchor y menor diámetro, que al desperdiciar menos agua aceleraran el proceso de molienda;<sup>1275</sup> o de mejorar los Cubos, al modelo de las Ruedas de Velidor; o de inaugurar el método del barril giratorio para el refinado, que acelerara el tiempo de maduración o incorporación de la harina de metal; o de introducir malacates en las minas para el transporte del mineral, pues una más rápida rotación del capital circulante invertido en la explotación minera garantizaba un incremento proporcional en el monto de la plusvalía extraída. Entre aquellos que invirtieron en reservas de almadanetas se encontraban el dueño del ingenio Pampa General José Ascasubi,<sup>1276</sup> y del ingenio Agua de Castilla Conde de la Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra, quienes ajustaron entre 1745 y 1752 una docena de transacciones por la suma de \$144.432.<sup>1277</sup> Domingo de Achucarro, arrendatario del ingenio La Purísima Concepción de Turú, adquirió en Buenos Aires insumos para sus ingenios entre 1759 y 1766 por la cuantía de \$5.149.<sup>1278</sup> Pedro Antonio de Azcárate, arrendatario sucesivamente de los Ingenios Ichuni, Chaca y San Miguel, compró insumos en tres operaciones entre 1775 y 1778 por la suma de \$25.250.<sup>1279</sup> Luis de Orueta, arrendatario del Ingenio Laguacayo y dueño de las haciendas de Azángari, Totoras, y Oyanumen, en Tarapaya, adquirió en 1780 y 1787 a Juan Antonio de Lezica y la Compañía de Filipinas insumos por valor de \$22.114.<sup>1280</sup> Y Juan Antonio Fernández Dorado, arrendatario del Ingenio Agua de Castilla, los Barraganes, y la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, invirtió entre 1786 y 1803, en seis operaciones, la suma de \$47.703.<sup>1281</sup> También se invirtió en mano de obra esclava destinada al trabajo en los ingenios de moler metales. En ese sentido José de Lizarazu celebró una operación de fiado con Ramón Palacios por valor de \$24.480.<sup>1282</sup> Propietarios de minas, como José Astuena, dueño de un yacimiento en el Cerro de Aullagas, eran excepcionales en el comercio a larga distancia con Buenos Aires. Entre 1744 y 1753 Astuena, en sociedad con Salvador Reguar, había celebrado una decena de operaciones por valor de \$92.617.<sup>1283</sup> Es más que probable que haya accedido al negocio minero después de haber incursionado en el comercio, pues su yacimiento se haya registrado recién en 1778.<sup>1284</sup>

El corto margen de ganancia obtenido por los azogueros sería entonces el motivo fundamental por el cual dejaron de invertir y se redujeron a trabajar sólo el metal pallaco. Asimismo, este corto margen explicaría el porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital minero, frenando el desarrollo económico de las regiones mineras. El azoguero arrendatario no sentía estímulos en mejorar los métodos de laboreo y refinado del metal, ni en introducir otros nuevos, especialmente luego del estruendoso fracaso del método de los barriles giratorios, ensayado por la Misión encabezada por el Barón Nordenflicht.<sup>1285</sup>

Los métodos nuevos costaban mucho dinero implementarlos, y sus resultados por lo general no se conocían hasta después de expirar el contrato de arrendamiento. Casi siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el aumento del precio del arriendo -tan pronto aumentaba la rentabilidad minera- pero no de los beneficios netos, por lo que el azoguero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar en el curso del arriendo, el capital empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y equipo. Por cuanto los azogueros eran renuentes a invertir fue entonces preciso también extenderles a través del Banco de San Carlos líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener corriente los ingenios.

En vista de la progresiva e indetenible decadencia de la mita, los azogueros debían calcular también el costo de reposición de la mano de obra forzada. Como cada mitayo rendía el doble que un minga y cobraba de salario sólo la mitad (20 reales semanales), para reponer la ausencia de un mitayo el azoguero necesitaba dos mingas, con lo cual la reposición le salía semanalmente cuatro veces (400%) el costo semanal de un mitayo.

## **P-I Fuentes documentales para el refinado del metal**

A los fines de esta investigación las fuentes primarias a tener en cuenta son las reiteradas Visitas de Ingenios practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, a partir de las cuales nosotros elaboramos nuestras Tablas C-IV, C-V y C-VI, y los Cuadernos Manuales de Lavas o Libros de Beneficio y Rescate. Si bien las Visitas guardan una información valiosísima, su credibilidad y detalle no siempre se mantuvo incólume. A juicio de Buechler (1973) y Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto ritual de inspección, con efectos puramente ceremoniales.<sup>1286</sup> Sin embargo, si observamos la Visita de 1781, veremos que la dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año, transformaron ocasionalmente esta institución en un instrumento de protesta social invaluable.<sup>1287</sup> Los Visitadores de ingenios eran designados en una época por los Corregidores respectivos y luego por los Subdelegados, recayendo siempre en "personas distinguidas y de honor". Sin embargo, estas designaciones estuvieron preñadas de intereses mezquinos y relaciones de familiaridad y jerarquía que enturbiaron la objetividad y neutralidad del Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar la ley que se esperaba de los metales, la naturaleza y diversidad de los mismos, la ley que cada metal rendía, el tipo de beneficio al que se sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las ingenios, los intereses que cada uno poseía".<sup>1288</sup>

Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la puntualidad con que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran pagados, las horas de trabajo en que se empleaban diariamente, y la puntualidad del azoguero en suministrarles misa, doctrina, y sacramentos por medio de sacerdote efectivo. Para conocer el giro de los ingenios los administradores debían llevar los Libros del Beneficio y Rescate, los cuales debían detallar los cajones de metal que se molían en cada cabeza por semana, cuánta era la gruesa de los metales que se lavaban semanalmente, qué cantidad de azogue se gastaba en cada cajón al incorporarse al buitrón y al lavarse y requemarse la piña. Estos Libros debían mostrar también el peso de la pella y el respectivo consumo y pérdida de azogue en el buitrón y cañón, así como el peso y valor de las piñas que se hubieren sacado y rescatado en el curso de las cinco semanas en que duraba cada beneficio. El resultado de pérdida o ganancia se deducía en estos Libros cotejando las

piñas producidas en dichas semanas con los gastos semanales del ingenio. Las causas de donde procede la pérdida o ganancia había de indagarse en

"...el método que observa en el beneficio y magistrales de que se valen con expresión de sus cantidades, sin omitir la anotación de las cabezas que tuviere aquel ingenio, el número de sus almadanetas, con el peso y la materia de ellas, los indios que se ocupan en cada cabeza y en los buitrones, cuantos dellos son mitayos y cuantos mingas, cuantos por gruesa y por punta, y si gozan del mismo salario que los del Cerro, y cuales son los tiempos regulares en que suelen mudarse las tandas, y el que tienen de descanso en sus pueblos, cuántos indios trabajan diariamente en los morterados de cada cabeza, y en los cedazos,...si aquel ingenio muele con agua permanente de río o de laguna, y si fuere con estas últimas se hará mensura de su circunferencia y profundidad, con prolija vista de ojos de sus seguridad y reparos, con más la ley a que actualmente se estuviere lavando".<sup>1289</sup>

Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se disimularan toda suerte de irregularidades tanto en el tratamiento de la mano de obra empleada en el beneficio, como en la calidad de las ruedas que se mudaren en los ingenios.<sup>1290</sup>

## **P-II Costos de baja o transporte**

El costo de la baja o conducción del metal desde la mina al ingenio importaba el pago de un flete a razón de dos pesos por aylo transportado, equivalente a medio cajón de metal sin incorporar.<sup>1291</sup> Si tenemos en cuenta que la labor minera que mas producía alcanzaba los 120 ayillos semanales, concluimos que en ese caso en particular se pagaba de flete a razón de 240 pesos semanales. Pero lamentablemente, el cálculo de la baja no puede hacerse por el número de ayillos declarado como almacenado en el ingenio, por cuánto ello no indica que los cajones de metal incorporado lo fueron con dicha cantidad de metal. Por lo general, los ingenios almacenaban en los galpones tres o cuatro veces más metal que el que echaban a los buitrones para incorporar. Por ejemplo, el Ingenio Pampa en 1784 almacenaba 3450 ayillos (1725 cajones) de metal, mientras incorporaba sólo 500 cajones, equivalentes a 4500 quintales. El Ingenio Laguacayo almacenaba en 1787 mil ayillos (500 cajones) de metal, mientras incorporaba sólo 125 cajones, equivalentes a 6250 quintales. En 1786 el Ingenio Ichuni almacenaba 600 ayillos (300 cajones), mientras sólo incorporaba 85 cajones (4250 quintales). Por último, en 1784 el Ingenio Chaca almacenaba 600 ayillos (300 cajones) e incorporaba sólo 120 cajones. En consecuencia, el costo de la baja o conducción del metal, de las minas a los ingenios, redondeaba un promedio de 165 pesos en cada uno de los 12 ingenios estudiados (columna VII de Tabla C-I), que a cuatro pesos por cajón alcanzaba al 13% del costo total de cada cajón (columna IX de Tabla C-I).

Sin embargo, el costo de la baja no era el mismo en todos los ingenios. Como por lo general, los azogueros contrataban el flete pagando el alquiler de las llamas, aquellos azogueros que fueron capaces de integrar la explotación minera y refinadora con el transporte del mineral en tropas de llamas propias abarataban considerablemente el costo de la baja. Este fue también el caso del azoguero Luis de Orueta, quien alcanzó a comprar y mantener un ingente número de llamas.<sup>1292</sup> La preferencia de algunos azogueros por tener tropa de llamas propias obedecía a la necesidad que tenían de emanciparse de lo que Platt (1987) define como una crónica inestabilidad estacional de los indios llameros en la

provisión de arrias, provocada por esa secular relación social que habían establecido con los productores de maíz.<sup>1293</sup>

En áreas periféricas a Potosí, como era el caso de Oruro, no sólo el costo de la saca o extracción debe haber sido más alto, dada la carencia, a fines del siglo XVIII, de población mitaya, sino también el costo de la baja. Este último debió haber sido mayor debido a la mayor distancia entre las minas y los ingenios, variando entre \$4 y \$8 por cajón. Pero a su vez, la ley del metal obtenida era mucho más alta en dichas áreas, única manera de que la operación se volviese rentable. Cuando el administrador del ingenio de Sora Sora, en Oruro, Don Juan Paredes, se vio precisado en 1772 a rendir cuentas de sus gastos confesó "...que el costo de cada cajón de la mina Catorce [en San Salvador de Antequera, Oruro] asciende a \$14 de saca y \$8 de conducción (\$22) llampo con broza". El alto costo de la conducción habría obedecido a la distancia entre la mina Catorce y Sora Sora. La broza tiene de ley "...según ha visto ensayar 9 1/2 marcos por cajón, y los llampos de 6 a 7 marcos". Sin embargo, "...cada cajón de la mina Diez cuesta así llampo como broza cerca de \$18 de saca y de conducción o baja \$8, que hacen unidos \$26".<sup>1294</sup>

### **P-III Molienda o morterado**

La proporción de capital constante o trabajo muerto invertido en la molienda o morterado era mucho mayor que la invertida en el proceso extractivo y también mayor al invertido en la fase del repaso. Este capital constante se invierte y consume como capital fijo (ruedas, almadanetas, ejes, triángulos, cedazos, cureñas, castillos, sobarbos, mazos) y como capital circulante (jornales de la mano de obra). El capital constante de un ingenio de moler metales lo constituía las rancherías para los indios, un galerón para los molinos de mazos y almadanetas, las ruedas y ejes de las cabezas de ingenio, un patio o pampeo, buitrones de lavado, lavas para los relaves, almacenes para acopiar por separado el mercurio, la sal, la cal, el plomo, la pólvora, el estaño, el hierro, el carbón, las velas, la táquia, y las piezas de herramientas (almadanetas, azadones, romanas, combas de enguisar, pearas de madera para fabricar andamios y montantes, hornos para quemar el metal negrilla). Arzans de Orsúa y Vela (1965) nos cuenta que cada eje de cabeza de ingenio traído de Tucumán costaba \$2.000, y Tandeter (1980) nos revela que en 1783 cada eje de rueda se tasaba en \$1.300.<sup>1295</sup> Las ruedas eran de madera con sus cinchones, abrasaderas, chavetas, pernos, y chapas de hierro, y costaban entre 100 y 200 pesos. Los cinchos y abrasaderas para ejes y ruedas se tasaban en 1788 a razón de 32 pesos el quintal.<sup>1296</sup> Existían además dos clases de sedazos, uno para metal Paco y otro para metal negrilla (de alambre), con sus bastidores de madera, su clavazón de fierro, y su tolva de cuero. Los sobarbos eran las paletas curvas de la rueda hidráulica, hechos de madera. Los morteros, o unidades de molienda, compuestos por los elementos arriba mencionados, variaban poco, desde los más chicos, de una rueda con dos cabezas y doce almadanetas, hasta uno de tres ruedas con cinco cabezas y 27 almadanetas como el del Ingenio de Cantumarca, del Mariscal de Campo José Montes y García.<sup>1297</sup>

Las ruedas, cedazos, cabezas, ejes, almadanetas, sobarbos, y mazos, por su escasa vida útil, deben ser sin embargo, consideradas parte del capital circulante, aunque algunos la computan como capital fijo. Esta consideración obedecía, en el caso de las almadanetas, a la enorme merma física que sufrían. El desgaste de las almadanetas era una de las causas principales de la demora o suspensión en el beneficio del mineral o quiebra de las lavas, y por consiguiente, de la baja productividad del ingenio medida en cajones de metal refinado semanales. En principio, la capacidad de molienda semanal de los molinos fluctuaba con el estado de las almadanetas. Debido al desgaste a que se sometían las mismas, en ciertas

oportunidades la cantidad de metal molido prevista para cada cabeza de molino no alcanzaba a ser cubierta. En el Ingenio del Conde de Casa Real de Moneda los indios "...expusieron no poder enterar el número de harinas que se les obligaba sacar del morterado por que no molían mas las almadanetas".<sup>1298</sup> Moliendo los metales en almadanetas de bronce, que regularmente pesaban de 10 a 12 arrobas, se experimentaba en opinión de Cañete, al cabo de tres o cuatro meses, 6, 7, y 8 arrobas de merma, lo cual sólo podía suceder desgranándose de las almadanetas el bronce que faltaba, el cual se mezclaba con la plata que se beneficiaba. En el caso de estar cargadas de plomo y estaño, "...se van desgranando a tanta prisa que una almadaneta de doce arrobas, queda inútil a los seis meses de ejercicio, con merma de la mitad de su primitivo peso".<sup>1299</sup> También sucedía que cuando los indios mortiris, la mayoría de cédula o mitayos, cebaban los morteros sin cuidado, es decir, sin suficiente metal -de modo tal "que las almadanetas no golpeen en balde"- estas últimas sufrían mermas sin nombre.<sup>1300</sup>

Las reservas de almadanetas, sobarbos y mazos almacenados en los ingenios variaban también con la intensidad de la explotación. La Tabla C-III nos ilustra acerca del stock almacenado en cada uno de los ingenios de la Rivera de Potosí. En el Ingenio San Diego, del Conde de Casa Real de Moneda, arrendado por Alexo Bonifaz, se almacenaban en octubre de 1786 tres pearas de sobarbos, seis pearas de mazos, seis pearas de trozos, y seis pearas de cadenas.<sup>1301</sup> En el Ingenio Quintanilla del Gral. Luis de Echeverría, arrendado por Bernabé Ezcurrúchea, se almacenaban en agosto de 1781 27 pearas de sobarbos, 5 1/2 pearas de mazos, 2 1/2 pearas de cadenas, y 4 pearas de trozos.<sup>1302</sup>

El consumo de capital constante en la fase de la molienda incluía el gasto en mano de obra mitaya. El trabajo del morterado se circunscribía a los indios mortiris, casi siempre indios de cédula o mitayos. Por el contrario, los indios repasiris, destinados a la fase del refinado, eran casi siempre mingas, y por tanto, parte del capital variable, que se consumía como capital circulante. Pero no siempre esta división entre mortiris y repasiris marcaba la separación entre mitayos y mingas. Había casos -aunque los menos- de elasticidad de sustitución, en que a diferencia de lo afirmado por Tandeter (1980), el morterado era desempeñado por mingas, así como también se dio el caso que el repaso fuera practicado por mitayos.<sup>1303</sup> En el Ingenio Gambarte, que Antonio Almandóz arrendaba en 1781, el Visitador denuncia la presencia de nueve mingas en el morterado amén de los 14 mitayos asignados en cada uno de los dos turnos. Dado que el ingenio contaba con dos cabezas y necesitaba mortificar el mineral con 20 trabajadores, sufría un déficit de seis mortiris que se compensaban plenamente con los nueve mingas.<sup>1304</sup> El frustrado Código Carolino establecía que los indios repartidos para el morterado de los ingenios trabajaran en tres puntas por el término de 12 horas, con 24 horas de descanso. Esta disposición fue la que más resistencia generó por cuanto la mayor parte de los azogueros repartía sus indios en dos puntas. A los mortiris se les pagaba por el trabajo en el ingenio a razón de 3 1/2 reales por tarde, lo cual devengaba al cabo de las cuatro mitas de a 12 horas cada una -que trabajaba cada indio en los dos turnos de la semana- la suma de catorce reales. Pero para tener derecho al jornal se señalaba por tarea lo que cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de ingenio, era capaz de moler al cabo de 12 horas. Esto alcanzaba a un cuarto de cajón de harina (que llamaban medio topo) por cada almadaneta cada 12 horas, o tres cajones (seis topes) cada seis días. De modo que cada cabeza debía producir un promedio de 15 cajones semanales.

La demanda de la mano de obra mitaya para el aviamiento del morterado y los cedazos se medía entonces conforme a los mazos y almadanetas que cada molino tuviese. Se reconocía por experiencia, según Cañete,

"...que para cada cabeza de ingenio son suficientes cuatro hombres, el uno a quien llaman carador para el cuidado de la solera, otro gransiri para el acarreo de metales desde el pampeo hasta el morterado, el tercero cedacero para cernir las harinas, y el cuarto golpeador, es notorio el exceso de la asignación que hizo el Virrey Conde de la Monclova (1692) en los 40 indios por punta para cada cabeza de ingenio y mina que corresponde a la mita gruesa de 120 sirvientes, pues aunque repartido este número entre minas e ingenios, queda reducida a 60 indios la gruesa destinada para el trabajo de las fincas de beneficio, resulta de su distribución en tres puntas que deben entrar a servir semanalmente 20 indios, los cuales no pueden tener ocupación fructuosa aunque distribuyan entre sí el trabajo alternando diez de día y otros tantos de noche por el motivo arriba mencionado..."<sup>1305</sup>

Pero la demanda de mano de obra mingada para el morterado dependía de la estación del año en que se molía. En verano, cuando por abundancia de agua en las lagunas las ruedas trabajaban al máximo, se requería contratar un suplemento de trabajo en mano de obra mingada.<sup>1306</sup> Capoché nos informa que en las Visitas hechas en el siglo XVI por el Dr. Diego de Zúñiga y el Virrey Martín Enríquez un ingenio de dos cabezas con seis mazos en cada una llevaba asignado 50 y 28 indios respectivamente, y un ingenio de una cabeza con 8 o 10 mazos se le asignaba 32 y 24 indios respectivamente, o un promedio entre 2 1/2 y 3 indios por almadaneta. Posteriormente, en 1692, el Virrey Conde de la Monclova asignó cuarenta indios por punta para cada cabeza de ingenio y mina, que correspondía a la mita gruesa de 120 sirvientes. Esta proporción fué siendo reducida a medida que la mita fue mermando. Durante el siglo XVIII el número de mitayos empleados en cada almadaneta sufrió una caída aún más brusca. En base a la información provista por las Visitas de ingenios y minas nos ha sido posible establecer la relación de la mano de obra necesaria para cada cabeza de ingenio. En la Visita del verano de 1778, los indios del Ingenio San Miguel dijeron "...que siendo el Ingenio de diez almadanetas, les mandan que sólo con nueve mitayos enteren lo que debían hacer entre diez indios por almadaneta".<sup>1307</sup> El Ingenio Chaca, que contaba con 19 almadanetas, revela en la Visita de noviembre de 1787 la existencia de 30 indios en el morterado, lo que da una proporción de 1 1/2 mortiri por almadaneta o de 7 1/2 mortiris por cabeza de ingenio.<sup>1308</sup> En forma similar, el Ingenio Ichuni, que contaba con 11 almadanetas, revela en la Visita de octubre de 1786 la existencia de 16 indios en el morterado, lo que también da una proporción de 1 1/2 mortiris por almadaneta.<sup>1309</sup> En el caso del Ingenio Agua de Castilla "Nuestra Señora de la Asunta" que contaba con 12 almadanetas, la Visita de noviembre de 1787 revela que por no tener asignación de mita alguna trabajaban en el morterado 20 indios mingas.<sup>1310</sup> Y el Ingenio Nuestra Señora de la Cuesta, que también contaba con 12 almadanetas, la Visita de agosto de 1784 revela que por estar los indios mitayos ausentes trabajaban en el morterado 20 indios mingas, lo que da un promedio de 1 1/2 mortiri por almadaneta.<sup>1311</sup> Sin embargo, por lo común, los indios mingas huían de la molienda, por ser esta etapa del proceso productivo la más dañina para su salud, debido a las partículas de plomo mezcladas en el polvo, que por el efecto del morterado del metal se despedía continuamente.<sup>1312</sup>

Si bien el morterado, el repaso, y el lavado, exigían una cantidad de trabajo vivo relativamente inferior al de la fase extractiva, entre las etapas del refinado no existía una proporción fija. La gruesa o total de los indios de cédula asignados a cada cabeza de ingenio

se repartían en dos o tres puntas que oscilaban entre 6 y 20 indios por punta. Una dificultad de la fuente documental descubierta estriba en la confusión que el propio Visitador hacía de la gruesa de indios de cédula con el número de indios por punta. Habiéndose comprobado el número exacto de puntas en cada gruesa, pudo establecerse fehacientemente el número de indios que servía en cada punta. Aunque también la legislación vigente establecía que la gruesa de los contingentes de indios mitayos asignados a cada cabeza de ingenio fueren divididos en tres puntas, en muchos casos fueron distribuidos en dos puntas, y en un sólo caso (el del Ingenio Canteros) en cuatro puntas.

El consumo de mano de obra medido en número de indios era calculado anualmente en las Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios reales. La información escrita y planillada que dichas Visitas producían, debidamente volcada en nuestra Tabla C-V, consistía en el número de ruedas (columna II), el número de cabezas (columna III), el número de almadanetas (columna IV), el número de indios en el mortero llamados mortiris (columna V), el número de indios por gruesa (columna VI), el número de puntas o equipos de trabajo (columna VII), el número total de indios mitayos (columna VIII), y el número de total de indios mingas por lo general repasiris (columna VIII). Si leemos con detenimiento las cifras que nos proveen las columnas VI, VII y VIII de la Tabla C-V, y hacemos los cálculos del caso observaremos que de 20 ingenios de los cuales contamos para agosto de 1781 con información completa al respecto, diez ingenios estaban divididos en dos equipos de semana, nueve en tres equipos de semana, y uno en cuatro equipos de semana, lo cual nos da una tasa promedio de 2 1/2 puntas por gruesa (columna VII de Tabla C-V). De once ingenios con que se cuenta con información para octubre de 1786, cinco ingenios tenían sus gruesas de indios mitayos distribuidas en tres puntas, otros cinco ingenios en dos puntas, y un ingenio en cuatro puntas, lo cual nos da un promedio general de 2 3/5 puntas por gruesa (columna VII de Tabla C-V). Pero como veremos más adelante, no sólo los Visitadores de Ingenios confundían la gruesa (total) de indios con el número de indios por punta o equipo de semana. También los historiadores e investigadores especialistas en el tema han caído en este error, con derivaciones en el cálculo de la renta mitaya.

Sabido es que en el largo plazo se registra una tendencia a la baja de la población mitaya respecto a la población mingada, y en la coyuntura de crisis social una acentuación de dicha caída.<sup>1313</sup> De quince ingenios que cuentan para agosto de 1781 con información completa al respecto, en trece ingenios el número de mingas supera al número de mitayos a un promedio de 2 1/2 mingas por cada mitayo, y en dos ingenios (San Miguel y Guariguari) el número de mitayos supera al número de mingas a un promedio de 1,2 mitayos por cada minga, lo cual da una tasa promedio general de 2,3 mingas por cada mitayo (columna IX de Tabla C-V). Seis años más tarde, en octubre de 1786, ocho ingenios de los que se cuenta con información revelan que en seis ingenios por cada 2 1/3 mingas servía un mitayo y en dos ingenios la proporción entre mingas y mitayos era pareja, lo cual da una tasa promedio general de un par de mingas por cada mitayo (columna IX de Tabla C-V). Estas cifras nos demostrarían que en la coyuntura de crisis social provocada por el alzamiento de Tupac Amaru la incidencia del ausentismo mitayo fue mayor en la esfera extractiva que en la fase del beneficio. De aquí que, donde más se dio la necesidad de contratar indios mingas fue en las labores.

La tendencia de un gradual crecimiento de la población mingada hizo posible también la existencia de ingenios operados sin mita alguna. En los casos de los ingenios Ramírez o Angel Custodio, arrendado por Antonio Mendoza; Cuti, arrendado por Casimiro

Calderón y Olarte a su dueño Juan de Dios Mora y Pimentel; y el de la Purísima Concepción de Turú, arrendado por Domingo Achucarro, por no tener asignación de mita contrataban en agosto de 1781 solo indios mingados (naborias en México).<sup>1314</sup> Como consecuencia de esta inflación de ingenios sin mita Cañete en su Código denuncia, con preocupación defensora del interés de los privilegiados por la mita, que "...en lugar de sacar aprovechamiento no hacen sino poner asilo para los desertores de la mita o disminuir por lo menos el número de los operarios libres que mingan en Potosí para su servicio".<sup>1315</sup> Tandeter (1980), en cambio, sugiere que estos ingenios arrendaban mano de obra mitaya a los dueños o arrendatarios de ingenios con mita.

Tomando en cuenta la relación numérica de 1 1/2 mortiris por cada almadaneta, o de 7 1/2 mortiris por cada cabeza de ingenio, nos fue posible elaborar la columna V de la Tabla C-V. Cuando en ella encontramos casos de ingenios en que el número de indios de cédula (mitayos) asignados en cada turno (col. VIII) supera al calculado en la columna V, podremos concluir en la posibilidad de que el sobrante de mano de obra descansara o fuere simplemente transferido a la fase del repaso, en los buitrones. Cuando por el contrario, el número de indios de cédula (col. VIII) es menor al calculado en la columna V, deberemos concluir que la fase del morterado mingaba indios de cédula en descanso de otros ingenios o tomaba prestado mano de obra mingada a la etapa del repaso o refinado. Como podremos comprobar de la lectura de la Tabla C-V el contraste entre ingenios es significativo. De 24 ingenios con asignación de mita de los que disponemos de información puntual para agosto de 1781, siete ingenios pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de repaso, 16 reclaman una transferencia de indios mingados de la fase del repaso, y en uno sólo (Gambartes) el número de mitayos casi se igualan con los que deben ocuparse en el morterado. Las cifras brindadas por la Visita de octubre de 1786 no ofrecen variantes significativas. De 25 ingenios de los que contamos con información para 1786, ocho ingenios pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de repaso, 16 reclaman un auxilio de indios de cédula a otros ingenios, y en un sólo ingenio (Agua de Castilla, Canteros) el número de mitayos casi se iguala con los que deben ocuparse del morterado.<sup>1316</sup> Para remediar los inconvenientes que significaban a los indios la decadencia de las moliendas, al ser pocos los ingenios que molieron medio cajón de harina de metal diario por almadaneta, fue preciso a fines del siglo XVIII reducir aún más la gruesa de cada cabeza de ingenio de 22 a 13 indios, distribuidos estos últimos en tres puntas de a cuatro personas, o en dos puntas de a seis personas, o un promedio de cuatro o seis mortiris cada cinco almadanetas. Es tal el nuevo ritmo de explotación que en el Ingenio Barragán, de Doña Eugenia Muñoz de Cuéllar, que arrendaba Juan Antonio Fernández Dorado, donde cada una de sus dos cabezas contaba con cinco almadanetas, los indios "...dixeron que la paga es conforme los topos de harinas que sacan y no por jornal, y que no pueden dar cumplimiento al cupo de harinas del morterado ni aún con aiuda de sus hijos". Más aún, los indios se quejaban que "...el enterador los obligaba a poner en dos partes pongos o semaneros y a dar seis indios cada noche para el morterado, debiendo ser cuatro". Asimismo, los indios se agraviaban de que el beneficiador Manuel Figueroa los azotara, y como prueba "...presentaron dos lazos de cuero que llaman torillos, con lo que dijeron los azotan".<sup>1317</sup> Finalmente, con el incremento de la población mingada en menoscabo de la mitaya, el costo de la molienda de cada cajón subió de dos pesos en la década del 70 a cinco pesos cada cajón en 1802.

Para aumentar la molienda se le pagaba también a cada mortiri por encima de esta tasa diez reales por cada topo de harina molido y cernido (correspondiente a medio cajón de harina). Mas como los indios solían echarle agua a las harinas de metal, lo cual llamaban

pirinchar, lograban amortiguar el peso de esta tarea, y en consecuencia inflar el volumen de los topes a devengar en el jornal. Amén de la tarea de moler y cernir el mineral, los mortiris eran compelidos en la semana de descanso a levantar y secar las masas, tarea imprescindible para poder lavar los metales, lo cual solía durar a lo sumo uno o dos días, y por lo que se pagaba a razón de medio real cada hora.<sup>1318</sup>

Entre los ingredientes que contribuyeron a sobre-explotar la mano de obra indígena en el Alto Perú se encontraban la cantidad de insumos para la producción de plata que les eran requeridos a los mitayos (sal, táquia, ceniza, baldes y llamas para el transporte del mineral, pabilo para las velas, etc.), la poca o ninguna retribución con que se les remuneraba dichos insumos, y la explotación de que eran objeto por las pulperías que operaban dentro de los ingenios. Cuando los indios se hallaban ociosos por escasez de agua con que mover las ruedas del molino, o por carecer de metal suficiente con que cebar el mortero, o repasar la harina en los buitrones, se les obligaba también a arcar cebada, carbón y sal, embarrar las piñas con ceniza, y guardar y limpiar las herramientas.<sup>1319</sup>

#### **P-IV Repaso.**

La proporción de capital constante en la composición del capital minero invertido en la fase del repaso era también mayor que la invertida en el proceso extractivo, aunque algo menor a la invertida en la fase de la molienda. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (buitrones, hornos, azogue, azadones, servicio de mita, etc.) y como capital circulante (hierro, cobre, sal, cal, plomo, y el azogue que se perdía). El consumo de capital fijo en la fase del refinado se reducía al gasto en buitrones y azogue. A los buitrones, al cabo de los años, se los reempedraaba "...hasta ponerlos del tamaño que antes fueron", y a las lavas se le reponía la ramada y su canal de madera.<sup>1320</sup> El azogue poseía una larga vida útil pues, aunque con merma, se recuperaba en cada lava y volvía a invertirse en el proceso productivo. Por ello, el azogue que no se perdía debemos caracterizarlo como capital fijo, y aquel azogue que sí se perdía (14 onzas por marco de plata producido) tendríamos que caracterizarlo como capital circulante.

La producción de metal refinado se medía en cajones semanales que fluctuaban entre 4 y 40 según la cantidad de indios empleados, la ley del metal procesado y la cantidad de agua que movían los morteros.<sup>1321</sup> En los buitrones, el metal de labor se distribuía en ocho filas de a 17 cuerpos o montones cada una, donde se practicaba la amalgama del azogue, la sal, la cal, el plomo, el cobre, el estaño, y el metal. La amalgama se distribuía en cuerpos, con una proporción de entre tres y ocho libras de azogue suelto cada cuerpo de metal pallaco, o entre seis y dieciseis libras de azogue cada cajón de igual metal. En los casos del metal negrilla, por su alta ley, la amalgama requería un consumo ingente de azogue que oscilaba entre 15 y 60 libras de azogue por cuerpo.

La dificultad de la fuente consultada estriba en la confusión que el propio Visitador hacía de los cuerpos y cajones. Habiéndose comprobado que cada cajón del buitrón suponía dos cuerpos de metal pallaco y cada cajón de la lava cinco cuerpos de metal negrilla o de relaves, se pudo eliminar dicha confusión. Los cuerpos de metal podían estar rellenos de metal de labor y mezclados con callas o barreta, o rellenos de pallacos líquidos escogidos a martillo.<sup>1322</sup>

Los cajones en que estaba férreamente dividido cada buitrón tenían seis pies de largo y diez pies de ancho, y tenían capacidad para 50 quintales. En cada cajón, un par de indios

mingas o uno a más no poder repasaban el metal con los azadones y los pies durante un período que oscilaba entre cuatro semanas y dos meses, según la naturaleza de la mena (mineral del cual puede obtenerse un metal), hasta tanto el azogue se incorporara y tomara la ley del metal. Antes, cuando se contaba con abundante ijchu (paja de la puna), se fomentaba con fuego el proceso de incorporación, durando éste sólo de 5 a 6 días. Si el tiempo era caluroso apresuraba la madurez del repaso, y por el contrario, si el tiempo era de hielos o no iba limpio el azogue el beneficio se dilataba.<sup>1323</sup> Asimismo, si el metal era caliente o paco el repaso debía ser suave, y si era frío o piritoso (negrillo), el repaso debía ser fuerte.<sup>1324</sup>

Si bien la existencia de metal en los galpones, los buitrones, los lavaderos, y los almacenes se medía por la calidad del metal de los labores, y la calidad del ingenio en la fase de la molienda se medía por el número de cabezas, ruedas, y almadanetas, la calidad del ingenio en la fase del repaso o refinado se medía exclusivamente por el número de cajones que poseyeren los buitrones y las lavas. En los galpones, patios y pampeos se hallaba el metal barreteado recién llegado de las labores medido en ayillos o cargas, equivalentes a medio cajón (25 quintales); en los buitrones se hallaba el metal incorporado con azogue distribuido en cajones de 50 quintales medido en cuerpos y tareas, a razón de dos cuerpos o 40 tareas cada cajón; y en los lavaderos o lavas se hallaba el metal de relave también medido en cuerpos y tareas, a razón de cinco cuerpos cada cajón. Por costumbre cada tarea debía tener sólo 5 arrobas y 5 libras (130 libras) en bruto.<sup>1325</sup>

En los galpones, el metal difería en su calidad y en la forma en que venía de las labores. Según su calidad (ley del mineral) el metal podía ser paco, mulato, negrillo, o de relaves. Estos dos últimos metales eran los de más alta ley, al extremo de requerir fundición cuando el ingente consumo de azogue que se requiere en el amalgamado vuelve a este último método no rentable. El metal negrillo comprendía al metal tacana, como asimismo al acerado y al chumbe (castaño). Por metal de relave se conocía a los restos de amalgama depositados en el fondo de las lavas. Según su forma el metal podía venir en maza, en corpa, en broza (desecho o desperdicio), en granza, en llampo, o en líquido. Por lo general, el metal venía pallaco, es decir, todo lo que venía derecho de las minas y canchas. Cuando por el contrario, el metal venía "de labor", quería indicar que poseía una mayor ley. Las granzas era aquella parte gruesa del mineral molido que por no pasar por el cedazo de alambre volvía a la fase de la molienda.<sup>1326</sup>

El consumo de capital variable en la fase del repaso -que representaba el mayor porcentaje del costo total- se reducía al gasto en mano de obra mingada, sal, cal, plomo, bastimentos, herramientas, y en el azogue que se perdía en el buitrón y el cañón. Este gasto, para el aviamiento del repaso, se computaba conforme al número de cajones que poseyeren los buitrones, y a la época del año que se tratase. En verano, por abundar agua en las lagunas, las ruedas de los molinos trabajaban al máximo, y por ende, la cantidad de metal procedente de la molienda que arribaba a la etapa del repaso alcanzaba su tope más alto. Para el cómputo de la mano de obra insumida en el repaso habremos de recurrir a la información brindada por la Visita de octubre de 1786. La precisión con que nos informa del número de indios destinados a cada una de las dos etapas del procesamiento del mineral así como de la cantidad de metal y azogue incorporados, la vuelven una fuente inexcusable para el cálculo de los respectivos insumos. Del promedio de dichas cifras concluimos que un repasiri procesaba entre 2 y 3,5 cajones de metal semanales. Para mayor precisión, si en 1786, en el Ingenio Chaca, se denuncian 135 cajones de metal sin incorporar en el buitrón y sólo 40 indios repasiris, para producir 40 cajones de plata semanales, habremos de concluir que cada 3,5 cajones de metal pallaco sin incorporar requerían un repasiri para producir un

cajón de metal refinado por semana. Y si en el mismo año, en el Ingenio Ichuni, se denuncian 85 cajones en el buitron y sólo 25 indios repasiris, para producir 25 cajones semanales, habremos de concluir que cada 3 1/2 cajones de metal pallaco requerían también un sólo repasiri para producir un cajón de metal refinado por semana.<sup>1327</sup>

La proporción de capital constante invertido en la fase del lavado era semejante al invertido en la fase del repaso. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (lavas y azogue que se recuperaba) y como capital circulante (azogue que se perdía). En las lavas para los relaves, que poseían un promedio de 20 cajones cada una, se cargaba entre 12 y 16 libras de azogue en cada cajón, sacándose un promedio de 7 a 8 marcos de plata, de ley de 11 dineros, vendiéndose en 8 y hasta 12 pesos el cajón.<sup>1328</sup> La mudanza de las masas de metal desde los buitrones a las cochas (lavaderos) era practicada por los indios de cédula y para ello se les pagaba medio real por cada cajón (dos cuerpos) de masa metálica mudada, con independencia de lo que hubieren devengado en las demás tareas del ingenio. En las cochas un indio sentado removía continuamente con un pie la masa o cuerpo del metal.

El fruto de estas lavas llamados relaves era también producido por los trapiches, para luego ser vendido a los ingenios.<sup>1329</sup> Cuando un administrador de ingenio adquiría metal de relave en los trapiches, el ingenio participaba indirectamente del trabajo de la kajchas o capchas. La plata tenía en estos casos dos precios: el que el Banco de San Carlos pagaba por ella a los ingenios fijada oficialmente, y el que los ingenios pagaban a los trapiches, entre 8 y 12 pesos por cajón.<sup>1330</sup> Este último precio, al contrario del primero, estaba sujeto a fluctuaciones considerables. En este caso, la plata producida mediante fundición siempre valía menos que la producida por amalgamación, a causa de la abundancia de impurezas que contenía.

Finalmente, la proporción de capital constante con respecto al capital variable invertido en la fase del desazogado era mayor que el invertido en el repaso y el lavado. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (hornos, caperuzas) y como capital circulante (ijchu, táquia, yareta, carbón, etc.). El consumo de capital fijo en la fase del desazogado se reducía al gasto en hornos y ternos de caperuzas.<sup>1331</sup> Los hornos se solían refaccionar periódicamente, haciéndoles de nuevo los suelos y las bóvedas. El consumo de capital circulante se circunscribía al gasto en yareta, táquia, y carbón. En un horno se gastaban en el espacio del día 2 1/2 quintales de yareta, y otro tanto de noche, que a seis reales el quintal montaban los cinco quintales diarios \$3,6.<sup>1332</sup>

La proporción de azogue a incorporar era conforme a la ley del metal que se pensaba extraer. La ley del metal que se sacaba en Potosí, en la década del 80, fluctuaba de cuatro a cinco y medio marcos por cajón, de 50 quintales cada uno.<sup>1333</sup> Cuánta más baja era la ley del metal menos azogue se consumía y menos cajones de metal refinado se sacaban. Según Cañete (1802), el cómputo corriente era que cada marco de metal necesitaba la carga correspondiente de 4 libras de azogue. Por esta regla, el mineral que daba cuatro marcos el cajón, por lo general metal pallaco, necesitaba en tiempos de Cañete 16 libras de azogue en cada cajón (4 marcos multiplicados por 4 libras), el que era de 5 marcos necesitaba 20 libras, y el de 6 marcos, por lo general metal barreteado, necesitaba 24 libras.

El consumo de azogue y la consiguiente producción de plata medida en cajones era también calculado anualmente en las Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios reales. La información escrita y planillada que dichas Visitas producían, debidamente

volcada en nuestra Tabla C-VI, consistía en el monto de aylos de metal existentes en los galpones (columna II), el monto de metal sin incorporar existente en los buitrones medido en cuerpos (columna IV), el monto de metal sin incorporar existente en los mismos buitrones medido en cajones (columna VIII), la cantidad de libras de azogue necesarias para incorporar cada cuerpo o cajón de metal (columna VI), y el monto de harina o azogue incorporado obtenido (columna VII). De resultas de multiplicar la cantidad de libras de azogue a incorporar (col. VI) por el número de cuerpos de metal sin incorporar existente en los buitrones (col. IV), o en su defecto el número de cajones de metal (columna VIII), se obtiene el monto de la llamada harina o azogue incorporado (col. VII). Cada cuerpo de metal equivalía a medio cajón de metal. Por ejemplo, vemos en la Tabla C-VI que en el buitrón del Ingenio de la Concepción de Guaillaguasi, que en octubre de 1786 arrendaba Carlos Hereña al Mariscal de Campo José de Montes y García, 48 cuerpos de metal estaban incorporados a 5 libras de azogue cada cuerpo o 10 libras cada cajón, 17 cuerpos de metal a 6 libras cada uno o 12 libras cada cajón, y 30 cuerpos de metal a 7 libras cada uno o 14 libras cada cajón.<sup>1334</sup> De aquí que no es factible convertir el número de aylos de metal que vienen de las labores en el número de cajones de metal incorporados, por cuanto las libras de azogue incorporadas variaban notablemente. Para precipitar un marco de plata se necesitaba entonces un promedio entre 3 libras (12 onzas) y 4 libras (16 onzas) de azogue en cada cuerpo. Ahora bien, esta regla no era uniforme, por cuanto las libras de azogue que se incorporaban en cada cuerpo de metal de los buitrones eran las que se presumía podían precipitar un determinado número de marcos de plata, de acuerdo a los ensayos que previamente se practicaban. Luego, en las lavas, se continuaba echando azogue en una proporción cada vez mayor, logrando así elevar el número de marcos de plata precipitados en la pella.

Los costos de producción de la plata se veían fuertemente afectados por el costo del azogue, el cual se perdía en gran medida. Esta pérdida se materializaba tanto en la etapa de su aprovisionamiento o transporte como en la etapa de su consumo. En cuanto a la etapa del transporte, Greve (1943) nos recuerda que ya en 1579 se dispuso que se enviase azogue de España a Indias empacado en forma de que cada cajón fuese sólo de un quintal, enviando las badanas necesarias para beneficiarlo.<sup>1335</sup> Este empaque o envasado no era siempre parejo, si tenemos en cuenta que

"...en los almacenes estaba experimentado que las badanas y los cordeles muchas veces pesaban más, ya por la ceniza que venía en el azogue, ya por lo que quedaba filtrado en las propias badanas, ya por los frecuentes ensayos o experimentos que por menor se hacía en que se desperdiciaba bastante azogue, ya por las guías que en los hornos diariamente se hacen, o ya finalmente por lo que se perdía y estraviaba en las continuas ocasiones que se medía para sacar y volver del buitrón".<sup>1336</sup>

Tanto el transporte del azogue procedente de Huancavelica (Perú) como el procedente de Almadén (España) se orquestaba mediante contratos de asiento. Estos alcanzaban a durar hasta diez años. Durante las décadas previas a la Rebelión de Tupac Amaru los asentistas del azogue proveniente de Huancavelica fueron los miembros de la familia Mendiolaza. Gaspar Alexo de Mendiolaza celebró el primer asiento en Lima el 29 de mayo de 1756.<sup>1337</sup> Producida la rebelión de Tupac Amaru, gran parte de las recuas de mulas que integraban la empresa de los Mendiolaza fueron devastadas en Chucuito por las partidas armadas. Cuando con posterioridad a estos hechos entró a llegar el azogue desde Almadén vía Buenos Aires, el asiento se asignó al conocido comerciante Tomás Antonio Romero.<sup>1338</sup> Anualmente se trajinaban de Huancavelica a Potosí de 9 a 10 mil quintales de azogue, para

lo cual se utilizaban como mínimo cuatro mil mulas. Los Mendiolaza tenían de su propiedad 40 piaras (400 mulas) y 300 mulas de remuda o repuesto, con lo que totalizaban 700 mulas tasadas en \$20.000, para despachar los azogues desde Chucuito, que era la Caja donde se depositaban todos los azogues de Huancavelica, a las demás Cajas Reales (Potosí, Carangas, Oruro).<sup>1339</sup> El flete que la Real Hacienda desembolsaba por el trajín de un quintal de azogue desde Huancavelica hasta Chucuito era de \$12 y el que pagaba desde Chucuito a Potosí de sólo \$4 1/2, o una tercera parte de los gastos totales. El flete incluía un porcentaje de refacción que daban las Cajas Reales por las mermas producidas durante el viaje, el cual variaba entre el 1 y el 2%.<sup>1340</sup>

El incremento del costo de aprovisionamiento del azogue, ocurrido a comienzos del siglo XIX, motivado por la tremenda escasez del mismo, habría a su vez incrementado los costos del repaso y el lavado. En 1801 el Marqués de Santa María de Otavi dictaminaba al solicitar auxilios financieros al Banco de San Carlos, con motivo de la "calamidad" desatada por la escasez de azogues, que un azoguero necesitaba \$64 para repasar (refinar) un cajón de metal de 7 marcos de ley. En 20 cajones semanales que es lo mínimo que se requería para mantener corriente (abierto) un ingenio y poder sacar piñas, el Marqués calculaba entonces que se necesitaban \$1.280, y \$1380 si se incluían otros gastos menores. El gasto semanal en azogue se calculaba siguiendo la regla de 4 libras por marco de metal a incorporar en cada cajón, a 4 reales cada libra de azogue. Si el cajón contaba con 6 marcos de metal, las 24 libras de azogue insumidas semanalmente por cada cajón (4 x 6), multiplicadas por los 80 cajones de las 4 lavas que debe poseer todo ingenio que se precie a si mismo, y sumadas las 150 libras para baño en las lavas, alcanzaban las 2070 libras de azogue semanales "...que es todo lo que puede pedir y se le debe de dar a un azoguero que entabla su trabajo para sacar las primeras piñas".<sup>1341</sup> El costo de la lava extraordinaria se computaba según el Marqués, a razón de \$12 por cajón, que en 20 cajones hacían \$240. Sumado el costo del repaso (\$1380) al del lavado de 20 cajones (\$240) se alcanzaba la suma de \$1620. Verificada la primera lava de 20 cajones, a 6 marcos de ley cada uno, la pérdida de azogue del buitrón y cañón de los 120 marcos de plata resultantes, regulados a 14 onzas por marco, producían de pérdida semanal 105 libras de azogue. Se habría demostrado entonces que en las 52 semanas del ejercicio anual se consumían enteramente 5460 libras de azogue, fuera de la carga primitiva de 2070 libras con que se habilitaron las primeras lavas. Conjuntamente con dicha carga, era necesario entonces, para el primer año de un ingenio: 7530 libras de azogue. Las dos lavas de 40 cajones de metal de 7 marcos de ley que hacen 280 marcos (40 x 7), y producían dos piñas de plata importaban entonces a \$7 y 3 reales cada marco la suma de \$2065. Rebajada la mitad de la piña sobrante que corresponde a la cuarta parte del total, que importan \$525, le quedaban al azoguero para los gastos \$1540. Deducidos el costo del refinado de 20 cajones, que montaban \$1620, del importe de lo devengado al rescatar las dos piñas resultantes del beneficio (\$1540), quedaban a comienzos del siglo XIX, de pérdida semanal en 20 cajones la suma de \$80.<sup>1342</sup> Pero si se necesitaban para producir 20 cajones en cada ingenio 7530 libras anuales de azogue, y para llevar igual corriente de lavas extraordinarias se necesitaban otras 7530 libras, sumadas y divididas en 52 semanas, importaban a \$73 cada quintal, la suma de \$211,3 semanales. Si a esta última cifra sumamos los \$80 de pérdida semanal anteriormente mencionados, concluye el Marqués de Santa María de Otavi, que al azoguero le vendría a faltar en 1801 en cada semana la suma de \$291,3, y a los 37 azogueros de la Rivera la suma de \$10.778,1.<sup>1343</sup>

En cuanto a la pérdida de azogue en la etapa de su consumo, ésta se materializaba en el buitrón y el cañón regulándose en 14 onzas de azogue por marco de plata producido.<sup>1344</sup> Esta pérdida era conforme a la ley del metal. El metal de más ley pierde más azogue. El de

\$3 pierde una libra, el de \$4 pierde 1 1/2 libras, el de \$5 o \$6 pierde dos libras, y el de mucha ley como el metal negrilla pierde hasta 10 o 12 libras, al extremo que a veces es preferible fundirlo en fraguas que procesarlo por el método de patio o amalgama. Según un testigo en un juicio por cuentas del Ingenio Machacomarca (Pcia. de Chayanta) "...siempre acostumbran los patrones dar por merma 3 libras en cada quintal de azogue".<sup>1345</sup> En México, 100 libras de azogue consumidas rendían 100 marcos de plata, y en el Alto Perú, el Gobernador Escobedo llegó a la conclusión que 100 libras de azogue consumidas rendían promedio 125 marcos de plata.<sup>1346</sup> En otras palabras, en el Alto Perú se consumía azogue a razón de 4 libras cada 5 marcos de plata producida. Esta diferencia entre Perú y México obedecería, según Bakewell (1986), a la superioridad del beneficio usado en Potosí, o podía reflejar diferencias reales de calidad entre las respectivas menas.<sup>1347</sup>

La diferente calidad del beneficio del metal practicado obedecería a su vez, según Bargalló (1955), a la diferente calidad de los repasos y la diversa cantidad y calidad de la sal, caparrosa, y lamas que obraban en el proceso del beneficio.<sup>1348</sup> Como remedio contra la pérdida de azogue, los administradores de Ingenio recomendaban que los repasos al principio fueran suaves. Por ello es que los repasiris por lo general eran mingas y no mitayos, por la pericia que se les requería en el trabajo de sus pieses. Entre otras recomendaciones para un mejor beneficio, Barba aconsejaba que si el ensaye mostraba al azogue perdiendo el color vivo que tenía necesitaba de plomo que lo limpiara, si iba deshecho en lis necesitaba quema, y si necesitaba de quema, recomendaba no se le echara sal porque ayudaba a calcinar la plata.<sup>1349</sup> En las regiones donde la mena (mineral del cual se extrae el metal) tenía un alto contenido de plomo, como en los Ingenios San Diego, Cuti, Laguacaió, San Marcos, Chaupi, San Miguel, Ichuni, y Chaca los mineros beneficiaban casi todo el mineral extraído mediante fundición, y la menor parte del mismo por amalgamación. Era en los ensayos donde se destacaban los inventos de procedimientos para ahorrar azogue. Estas innovaciones en la tecnología mineralógica elevaban la composición orgánica del capital minero. Los conocimientos, la información, y la formación cualificada son también parte del capital ("capital de conocimientos") tanto como el trabajo más elemental del indio repasiri. En 1794, Don José Asensio de Arismendi solicitó auxilio al Banco de San Carlos para "...formar a mi costa un laboratorio, para descubrir algunos efectos útiles,...especialmente la práctica de los ensayos reales".<sup>1350</sup> Entre las aplicaciones más notables, se destacan las que José Joaquín Fernández de Palazuelos llevara de Potosí a Copiapó entre 1749 y 1751, las que según Vicuña Mackenna (1882) cuadruplicaron la producción de plata en Chile.<sup>1351</sup> También deben mencionarse los treinta barreteros que José González Thames, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, trajo de Potosí. Esta importación de mano de obra calificada fracasó por la escasez de apiris que cumplieran las labores más pesadas.<sup>1352</sup>

Pero no en todos los Asientos mineros el beneficio del mineral se realizaba por el método del patio o, en otras palabras, con azogue de por medio. En lugares como Aullagas, Provincia de Chayanta, los metales se beneficiaban en gran medida por quema y no por azogue, con el fuego de táquia, que era el estiércol de los carneros de la tierra (llamas). Cañete (1791) nos informa que había mineros en Aullagas que invertían en sólo táquia más de 1200 pesos al año, o 24 pesos cada semana, a razón de 2 1/2 pesos por costal, o 1/2 real por carga.<sup>1353</sup> En la compañía que formalizaron en 1789 Juan Gelly y los hermanos Urtizberea, para la explotación de un mineral en Aullagas, se inventariaron en el embargo resultante 3250 cargas de táquia y yareta, a razón de 20 cargas al peso de ocho reales.<sup>1354</sup> Quince años después, la táquia sufre un aumento del 20%, de a 20 cargas por un peso en 1789 a 24 cargas el peso de ocho reales en 1805.<sup>1355</sup>

El promedio de sal a mortificar con la harina de metal era a razón de 20 arrobas de sal cada cajón (de 50 quintales cada uno) o de 10 arrobas cada cuerpo, o de 10 libras cada quintal de metal, con el fin de que se desengrase de la lama y pudiera así el azogue recibir la plata con menor pérdida. El costo de la misma alcanzaba entre 2 y 3 reales por quintal. Al escasear en 1784 la sal, provocó en muchos ingenios "...no hauerse podido incorporar más cajones de metal", llegando su precio a la cota de 6 reales por quintal. En el caso del Ingenio Agua de Castilla, del Marqués de Santa María de Otavi, se hallaban en 1784 en el buitrón 49 cuerpos de metal "...sin incorporar por no hallarse sal por cuio efecto estaba quasi parado el Ingenio".<sup>1356</sup> Finalmente, la situación de escasez se reagravó en 1793 pues la sal habría alcanzado el precio de 12 reales por quintal, o en otras palabras, a razón de 3 reales por cajón de metal incorporado.<sup>1357</sup> Posteriormente, en 1804, la sal también llegó a escasear pues adquirida al por mayor, montaba promedio tres reales por quintal, doblando el precio promedio vigente diez años atrás.<sup>1358</sup> Según Alonso-Barba, Potosí llegó a consumir en el siglo XVI 1500 quintales de sal diarios y según Assadourian 330.000 quintales anuales.<sup>1359</sup> Ignoramos el motivo por el cual la sal escaseaba en los ingenios, pero si nos atenemos a lo afirmado por Platt (1987) para el siglo XIX es más que probable que se debiera a la desinclinación estacional de los indios salineros por atender la demanda de los ingenios, dada su preferencia por bajar a las quebradas donde canjeaba la sal por harina y maíz, o su opción por hacer descansar sus llamas hasta la recuperación de los pastos con la llegada de las lluvias en diciembre.<sup>1360</sup> La sal no siempre era de igual calidad. Los mayoristas solían vender sal purificada, mientras que los indios solían traer sal muy terrosa o muy impura (no bien cristalizada). Por cada quintal de metal Bargalló (1955) aconsejaba echar de 2 1/2 a 5 libras de sal marina purificada, de 5 a 7 libras y hasta 10 libras de sal impura, no bien cristalizada, y de 15 a 20 libras de sal con mucha tierra.<sup>1361</sup>

También era preciso, antes de regar con azogue el buitrón, consumir cal, para reparar el daño que causaba la caparrosa natural que venía con los metales. La función de la cal era templar el metal cuando abundaba de "caperusa" (caparrosa). Su costo alcanzaba al peso (8 reales) cada quintal.<sup>1362</sup> Asimismo, en los cañones y caperusas, se consumía carbón, con el fin de desazogar las piñas de plata, a razón de dos arrobas por piña, costando tres reales cada carga.<sup>1363</sup> En el repaso, los gastos no eran sólo los de azogue, sal, y cal, sino también los de mano de obra calificada. Esta última comprendía lo gastado en administrador, horneros, mayordomo, y beneficiador.

En aquellos lugares donde se beneficiaba por quema era preciso beneficiar el mineral con plomo, y en aquellos otros lugares donde el metal de plata venía mezclado con plomo graciento (soroche o metal negrilla) era preciso beneficiar el mineral por quema y no con azogue. En los Ingenios San Diego, Cuti, Laguacaio, San Marcos, Chaupi, San Miguel, Ichuni, y Chaca los metales se beneficiaban con plomo por ser este en su humedad, superior a otros materiales. Luego se inventó agregar cobre, estaño, y cal sobre las mezclas de sal, azogue, y plomo, en cantidades oportunas para mejorar el beneficio.<sup>1364</sup> Se le echaba también, según el conocimiento del beneficiador, guías que llamaban 'ensayos por menor', poniéndole a cada cajón cuatro quintales de sal. La quema se hacía en hornos de revérbero para lo cual se dividía el cajón de metal en tres, cuatro, cinco y hasta diez partes, que se denominaba quemar al tercio, quinto, etc. Esta quema diferenciada permitía revolver el metal con toda libertad, según se iba quemando, y no "...que siendo como ha sido todas ellas como un metal común y ordinario, o como los relaves, no se ha logrado extraerle toda la plata que en sí tienen". La impericia, ignorancia, o ningún esmero de los beneficiadores y horneros que corrían con este encargo era el motivo de la corta ley que a veces daba la plata,

como en el caso del Ingenio de Machacamarca, en que gran parte de la plata quedó en el relave, sin habérsela extraído".<sup>1365</sup> Cuando en 1804 se quemaba al sexto importaba de flete \$45, al octavo de \$50 a \$60, y al décimo mucho más. Se pagaba flete cuando se beneficiaba por cuenta ajena. Cuando por el contrario, se trabajaba en ingenio propio y llevando gruesa de indios, no se incurría en gastos extras. En cada horno se ocupaban tres horneros y cada uno sacaba por cada ventana una manta o poncho de táquia, que se regulaba a razón de tres costales en cada horno, y en los tres hornos, nueve costales a \$2 1/2 cada costal.<sup>1366</sup>

El costo del refinado (morterado y repaso) de los cajones de metal incorporados reflejaba también el alza o baja de la ley del metal. Lamentablemente, carecemos de los Libros Manuales de Labas correspondientes a los Ingenios incluidos en las Visitas reseñadas. Sin embargo, contamos con la mención de los cuadernos de lavas del Ingenio Alantaña Chico, perteneciente a José Manuel Santander y Manuela Mier, cuyo administrador e interventor Gregorio Sempertegui (en representación de la Real Hacienda) procesaba en 1804 el mineral de la mina Cortaderas, en el partido de Poopó (Pcia. de Paria), propiedad de Ramón Moscoso. Sempertegui concluye, a comienzos del siglo XIX, que

"...ha llegado el caso que la mina Cortaderas no ofrece mayor utilidad en su laboreo y beneficio de su mineral por haber bajado la ley de las guías de 21 marcos que daban al principio (lo cual totalizaba un rescate de 147 pesos por cajón en Oruro), a sólo 13 y 14 marcos (lo cual reducía su rescate a 98 pesos por cajón) y las brosas de 10 marcos (o 70 marcos por cajón) a sólo 6 1/2 marcos (\$45,4 pesos por cajón) según consta de los cuadernos manuales de lavas. De modo que importando de costo la explotación de metales y su beneficio la cantidad de 65 a 70 pesos [por cajón] quedaba muy escasa utilidad a la Real Hacienda [administradora e interventora del Ingenio]".<sup>1367</sup>

La aleatoriedad de la ley de los cajones de metal refinados es una aleatoriedad condicionada por la aleatoriedad de la ley del metal extraído de las minas o lavores. Es así que la disminución del número de cajones de metal y marcos de plata producidos en 1804 denuncia también la baja de la ley del mineral extraído en dicho año. En el Ingenio de Alantaño

"...los cajones de metal paco regulado por 249 cajones 20 tareas sólo se han encontrado 104 cajones y los de negrillos de 116 cajones 30 tareas solamente han venido a quedar en 81 cajones 32 tareas más 44 cajones 32 tareas de los que yo he hecho sacar por lo que consta han producido los dichos cajones 1837 marcos..."<sup>1368</sup>

En conclusión, el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del costo en mano de obra se practicaba multiplicando el número de mingas contratados por el jornal semanal de 35 reales. Como el metal refinado era el producto del repaso de los indios, durante un promedio de tres semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra por tres. Más como el producto de tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la Visita multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si se dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de cajones producido semanalmente. El costo promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-II) alcanzaba entonces a 233 pesos semanales en cada uno de los doce ingenios estudiados,

lo que a una producción promedio de 38 cajones semanales redondeaba los seis pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno de los mismos (columna XV de Tabla C-II).

En otras palabras, los gastos del beneficio (\$4,5 en el morterado más \$6 en el repaso) que en épocas normales, en que no había escasez de azogue, y en lugares donde si existía mita indígena, totalizaban un promedio de \$10 por cajón absorbiendo alrededor del 35% de los costos totales, mientras que la baja o conducción participaba del 13%, y la extracción del otro 50%. Por cierto que este es el caso del promedio de los doce ingenios Potosinos estudiados, y que entre los mismos se daban profundas diferencias. Es así que el Ingenio más costoso en la etapa del repaso fue el Ingenio Agua de Castilla, del Marqués de Santa María de Otavi, arrendado por Pedro Zamudio, el cual alcanzó en mayo de 1793 la suma de 11,3 pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), redondeando un 35% de los costos totales del ingenio. Por el contrario, el ingenio menos costoso fue el Ingenio Laguacaio, del Marqués de Casa Palacio, el cual en marzo de 1792 alcanzó en la etapa del repaso un gasto de 2,6 pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o un 16% del costo total del ingenio (columna XV de Tabla C-II). Esta sorprendente diferencia de costos entre un ingenio y otro confirma también la sospecha de la relativa irrelevancia de la plusvalía absoluta extraída de la mano de obra calificada, y por consiguiente, la importancia que poseía en estos gastos la calidad de la limpieza del metal, libre de chumbes y malezas, la calidad de la amalgama y la quema practicada, así como la pericia de los repasiris en el refinado y la de los horneros y beneficiadores en la quema de los relaves y el metal negrilla. La graduación del temple de los hornos y la disposición de sus chacarruscas (mezcla de metales) eran otras de las tantas pericias que reducían los costos y elevaban la productividad del beneficio minero.

Los azogueros partían de la premisa que ejercían un control monopólico de las únicas instalaciones aptas para producir metales de la más alta ley, lo que los colocaba en una situación óptima para encarar únicamente el lavado de metales refinados por terceros (trapicheros) y extraídos por otros terceros (kajchas), es decir, se colocaban en una situación donde tomaban exclusivamente la última etapa, que era la más rentable y la de menores riesgos. Es así que en aquellos casos en que los ingenios beneficiaban metales ajenos a contrata, el monto del flete o gasto que se les cargaba dependía también de la ley del metal alcanzado en cada cajón y de la graduación del temple de los hornos requerido para cada metal. En el caso del metal refinado por el método de patio, su consumo de azogue -el insumo más costoso- dependía de la cantidad de marcos de plata existentes en cada cajón que se traía para refinar. Cuando en 1772 se le pregunta al administrador del Ingenio de Sora Sora, en Oruro (donde no había mita), Juan Paredes, el costo que tiene cada marco de plata, dijo que lo que está en tabla pagar por los particulares, en concepto de flete, para el beneficio de cada cajón (molienda incluida) procedente de la mina Catorce, en San Salvador de Antequera (Oruro), donde la ley del mineral rendía 9 1/2 marcos por cajón, "...era de \$45, además de la quiebra que resulte en el azogue".<sup>1369</sup> En una palabra, los 20 pesos que a un ingenio le costaba refinar un cajón de 9 1/2 marcos de ley, a un particular ajeno le costaba más de un 100% más caro. Como la mayoría de los mineros no se hallaba en condiciones de pagar los fletes cobrados por los trapicheros y los azogueros, optaban por vender directamente a los mismos las piedras más ricas de su extracción, sin beneficiarlas. Los que podían pagar dichos fletes pero no el transporte de los metales hasta Potosí para su acuñación, vendían también sus piñas al trapichero o al azoguero. De este modo, como Salazar (1985) lo describe para el caso chileno,

"...los mercaderes u hombres de caudal en general, y los trapicheros en particular, se convirtieron en mayoristas de los metales y minerales producidos por los mineros pobres. Es decir, se convirtieron en los receptores locales del oro y la plata que debían, según la ley, ser recogidos por la Casa de Moneda para su acuñación".<sup>1370</sup>

Pero la liquidación de esos metales en Potosí producía un rendimiento monetario inferior al que se obtenía empleándolos, aún sin acuñar, en el comercio exterior, y especialmente en las operaciones con Buenos Aires. Entre invertir las piñas sin acuñar en operaciones mercantiles o respetar la legislación de Indias, los mercaderes-hacendados optaron por lo primero. Esta opción habría determinado el desarrollo de un contrabando de metales preciosos.

Habiendo analizado exhaustivamente la estructura de costos de todos y cada uno de los ingenios de una muestra de doce sobre los cuales contábamos con información suficiente, resta entonces por dilucidar la rentabilidad bruta que se obtenía de la explotación de un ingenio. Si tenemos en cuenta que en Potosí, donde existía un Banco de Rescates, el marco de plata de 11 dineros de ley se rescataba a \$7 con 3 reales cada uno, podemos concluir que el valor de cada cajón de metal refinado en cada uno de los 12 ingenios estudiados alcanzó un promedio de \$33 (columna XVIII de Tabla C-II). Deduciendo los gastos para producir cada cajón, del valor promedio alcanzado con su rescate, concluimos que la ganancia bruta en cada uno de los 12 ingenios estudiados redondeaba los \$2,8 por cajón (columna XIX de Tabla C-II).

La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta debía contemplar no sólo los costos de producción sino también los costos de inventario. Estos últimos comprendían la diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba que los stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora, velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto.

## **Glosario**

acerado= metal de un color de acero

bastimentos= provisiones

broza= metal desecho o desperdicio

carador= el que cuidaba de la solera

cedacero= el que cernía las harinas

corriente= abierto

chacarruscas= mezcla de metales

chumbe= metal castaño

gransiri= el que acarreaba metales desde el pampeo hasta el mortero

harina= azogue incorporado

ijchu= paja de la puna

llameros= portadores de llamas  
montón= cuerpo de metal  
mortiri= indio a cargo del mortero de moler metal  
pirinchar= echar agua a las harinas de metal  
repasiri= indio a cargo del refinado  
tacana= metal de alta ley beneficiado por azogue  
táquia= excremento de las llamas  
tarea= lo que cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de ingenio, era capaz de moler al cabo de 12 horas.  
topo= medio cajón de harina de metal  
torillo= lazo de cuero con el que azotaban los indios

## Capítulo I-E-17

### **Penuria de agua, azogue y mano de obra en Potosí**

#### Índice

- Q-I Estacionalidad del trabajo de los ingenios de moler metal
- Q-II Insurrección y escasez de Mano de Obra
- Q-III Crisis del Azogue

#### **Glosario**

achacana= raíz que envenena  
amparar= cubrir las labores  
apanocas= exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser exceptuados de la mita mediando arbitrariamente dinero.  
calpcheo= robo de minas  
cantores= indios rescatados por los curas  
colqueruna= indios más solventes, por lo general originarios, que se rescataban a sí mismo de la mita con dinero;cutis o cudso= exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser exceptuados de la mita y que consistía en un sólo año más de descanso,  
juqueo= robo de minas  
leguaje=  
maraques o yanás= indios que se rescataban a sí mismo con su servicio personal  
mayto= casi un quintal  
quimbaletes= piedras donde se molía el metal  
rezago=  
tiempo de boya= seca en la Ribera  
tola= raíz de la leña

En este particular trabajo, me he propuesto analizar entre las causales de la crisis minera la penuria de los factores más elementales de la producción de plata propiamente dicha, es decir, del agua, el azogue, y la mano de obra.

## **Q-I Estacionalidad del trabajo de los ingenios de moler metal**

La capacidad de beneficiar el mineral fluctuaba con las estaciones del año. A diferencia del trabajo en las minas, el trabajo en los ingenios padecía de una fuerte estacionalidad, provocada por las lluvias. Esta última, marcaba no sólo la molienda y el repaso, sino también, como lo habremos de ver más adelante, la provisión de sal y el transporte del mineral de las canchas a los ingenios. En verano aumentaba la capacidad de molienda y refinado del metal, no sólo por abundar el agua sino también porque el calor aceleraba la madurez del repaso de la harina de metal. La falta de agua en la Ribera de Potosí, o tiempo de boya,<sup>1371</sup> impedía la fase del morterado pues la molienda era obra de las ruedas del molino, que se movían hidráulicamente. En múltiples oportunidades, la labor de los molinos de la Ribera fue suspendida por la continua sequía. Por el contrario, en invierno, que era tiempo de seca, la capacidad de molienda disminuía, según Mitre (1981), a la mitad de la vigente durante el verano.<sup>1372</sup> Las dos represas que tenía el Ingenio Guariguari, estaban en 1781, aunque bien reparadas, secas por no haber llovido. Para poder moler algo, pese a la sequía, el Ingenio juntaba agua primero con el rocío de la noche en uno de los estanques, y luego con el agua que vertían los cerros.<sup>1373</sup> Contrariamente, el exceso de agua, como fué el caso de la inundación de la Ribera en 1626, también perjudicó a la industria minera en forma extrema.

Existía de hecho, en la Ribera de Potosí, según refiere Manuel José de Vélez, una gran diferencia entre una parada por falta de agua a una parada por falta de azogue, por cuanto aquella "... era siempre por un tiempo poco más o menos, casi determinado, pues la falta de agua en las lagunas, sólo podía sobrevenir en las cercanías o a las inmediaciones de la estación propia, o indefectible de ellas".<sup>1374</sup> Por consiguiente, teniendo en cuenta que la sequía más larga, que se experimentó en 1781, duró 17 semanas, si cualquier año era tardío en aguas, podría a juicio de Vélez, calcularse más o menos la duración de la tardanza o demora en llover. Sin embargo, en las 17 semanas que a lo sumo podía por falta de agua parar la Ribera, nunca faltó el rescate de piñas en el Banco, pues aunque los ingenios no molían "...con el metal llampo, que no necesita molienda, con algún resto de harinas rezagadas, y con algún poco de metal del más selecto, que molían en quimbaletes o piedras, llevaban siempre algunos cajones al rescate".<sup>1375</sup> La poca agua que juntaban en las lagunas se conservaba para lavar el escaso metal que alcanzaban a incorporar en los buitrones, la cual se "...soltaba todos los viernes para sólo este fin [y no para moler], pues no era suficiente [el agua almacenada] para hacer correr las ruedas de los ingenios".<sup>1376</sup>

En la segunda sequía más larga, que aconteciera en el bienio de 1801-02, la Ribera de Potosí tuvo tres paradas por falta de agua. La primera, desde el 14 de diciembre de 1801 hasta el 4 de enero de 1802, durando entonces tres semanas. La segunda parada, desde principios de febrero hasta el 15 del mismo mes, que son dos semanas. Y la tercer parada, desde el 15 de marzo hasta el 29 del propio mes. De modo que, en un todo, fueron siete las semanas en que estuvo suspendida la molienda de los ingenios. Sin embargo, Cañete descubre, con la sagacidad que lo caracterizaba, que comparando la sequía de 1781, que durara 17 semanas, con la de 1801, que durara sólo 7 semanas, ni todos los azogueros

juntos pudieron sacar en 1781 tantas piñas como han presentado al rescate los azogueros Orueta, Vargas, y Azcárate en una sola semana de las siete que durara la sequía de 1802.<sup>1377</sup>

Esta anomalía en el monto de los rescates, lo lleva a Cañete a pensar, que bajo la excusa de las sequías, una minoría de azogueros se aprovechaba de los auxilios o socorros del Banco de Rescates así como de la disminución de los arrendamientos. En conclusión, Cañete observa que siendo en 1802 mucho menores las necesidades que en 1781, por durar menos semanas la sequía,

"...han sido mucho mayores los socorros, con la notable circunstancia de que entonces pagó la Azoguería una mitad de arrendamiento durante la parada, bajo de la obligación de satisfacer la otra mitad cuando empezase a correr la Ribera, y en el día los mismos que están beneficiando piñas apenas quieren pagar la mitad a toda fuerza, sin dejar contribución alguna en el Banco por cuenta de sus deudas, después que el Rey les costea todos los gastos de la saca y baja de los metales".<sup>1378</sup>

La variable de ajuste en la estacionalidad del trabajo de los ingenios era fundamentalmente la mano de obra mingada. Cualquier contracción o expansión de la producción debía ser periódicamente compensada con una similar contracción o expansión en la demanda de mano de obra "libre", recayendo el peso del trabajo, durante los períodos de contracción, en la mano de obra mitaya. La demanda de mano de obra mingada aumentaba entonces durante los veranos, por ser esta estación la de mayor expansión en la producción minera. El ajuste se registraba primero en la fase de la molienda, y luego, como un efecto derivado, en las fases del repaso y del lavado. En invierno, en estas dos últimas fases, la menor cantidad de metal procedente de la molienda se compensaba parcialmente con la mayor demora que tomaba la harina de metal en madurar.

La escasez estacional de trabajo en los ingenios dejaba a los mingas sin ingresos en los meses de invierno. Pero como la necesidad tuvo siempre cara de hereje, los azogueros se vieron precisados a tolerar que en estos meses de penuria los mingas se dedicaran al *calpcheo* (robo) o juqueo. Auxiliado con crédito por el Banco de San Carlos, y rebajado a la mitad el arriendo de sus ingenios podía el azoguero ir sosteniendo su explotación pese al escaso rescate de plata obtenido. Estas condiciones le permitían al azoguero conservar sus minas, ocupar en ellas la gente de Mita, o en su defecto, librarlas al *calpcheo*, y sostener también los demás operarios que quedaban sin ocupación, por la disminución del trabajo. En estas circunstancias, tenían ciertos operarios, el asilo de los "Minerales de afuera" (Aullagas, Porco, etc.), donde por estar los Ingenios situados en quebradas de aguas permanentes, jamás paraban por falta de agua. Los operarios que se quedaban en estos ingenios marginales encontraban quizá

"...un recurso más favorable, que en el tiempo de la corriente de la rivera, pues restringida la explotación [minera] por el azoguero, y dedicados [los operarios] a el *capcheo* o robo, lucraban más con esto, que con su trabajo personal para el azoguero".<sup>1379</sup>

La experiencia confirmaba esta verdad, pues el rescate de plata en el Banco por los *capchas*,<sup>1380</sup> -en el tiempo que por falta de agua paró la Ribera (1781)- "...aumentó un 200%, y aún más respecto del tiempo común de la corriente en los trabajos".<sup>1381</sup> Como los *capchas* sacaban de las minas sólo el metal de mejor ley, estaban en condiciones, después

de molido el metal en quimbaletes y sobrando como sobraban de azogue, de "...hacer su beneficio en cualquier arroyuelo, o poza pequeña, que formaban aún con el agua de los pozos".<sup>1382</sup> De esta forma, los *capchas* aumentaban su lucro, los cuales en ocasiones de una penuria como la que aconteciera en 1802, se convertían en "la gente más temible". No sería extraño, por ende, comprobar que entre el fin de la Rebelión de Tupac Amaru y la gran sequía existiera algo en común. En efecto, la capitulación de muchos caciques rebeldes habría obedecido en parte a las expectativas económicas crecientes que la gran sequía provocara.

## **Q-II Insurrección y escasez de Mano de Obra**

Cuando escaseaba la mano de obra mitaya, debido a rebeliones, fugas, pestes, festividades religiosas, o resistencia de los caciques y curas, los azogueros de Potosí se veían precisados a amparar sus lavores alternativamente o a recurrir en forma generalizada a la mano de obra mingada, especialmente durante los veranos, y a mayores fiados y colaciones en sus pulperías, y en su defecto, se veían obligados a parar el trabajo. Cuando algunos azogueros tenían cinco, seis, o más lavores y por ende no les alcanzaba la gente de mita bastaba según Cañete

"...amparar [las lavores] alternativamente pasando la gente [de mita] de unas [lavores] a otras por turno semanal, y en el entretanto las otras [lavores] que quedan sin trabajo se ponen al cargo de un sólo barretero que va trabajando lentamente ...[hasta tanto] regresa por su orden el amparo completo según el turno que queda referido".<sup>1383</sup>

Pero cuando con motivo de la rebelión Tupamara algunos tercios o puntas de indios de reemplazo no cumplieron con la mita, aquellos mitayos que se encontraban sirviéndola por encima de los cuatro meses establecidos, buscaban contra la voluntad de los mineros retornar a sus lugares de origen. En castigo, los mineros privaban a los indios del necesario pasaporte o cédula. Los que se atrevían a desobedecer eran considerados prófugos. En la labor de Macho, arrendada por Manuel Jáuregui, el enterador dijo que habían "...profugado 27 personas que él estaba reponiendo con mingas". En la labor Lobato, el número de mitayos disminuyó de 68 presentes en agosto de 1780 a 23 presentes en agosto de 1781, aumentando sin embargo los pongos de 2 a 23.

La protección de la producción agrícola pasaba por el estricto cumplimiento del porcentaje anual de la población indígena afectada a la mita minera, un séptimo de la población masculina de cada ayllu entre los 18 y 50 años. Sin embargo, los empresarios mineros aprovechaban cuánta ocasión tenían para aumentar el monto de energía campesina capturada. Una vez reclutados en las minas e ingenios, al año solían retenerlos contra su voluntad. No siempre los indios eran consultados acerca de su interés por seguir trabajando en el cerro. En la Visita que se celebró en agosto de 1781 en la labor de Sojo, que corría por cuenta del Coronel Juan Bernardo de Ynda, él mismo arrendatario de un ingenio, declara muy suelto de cuerpo y en total contradicción con las Ordenanzas del Virrey Toledo, que los 36 indios de Chayanta y los 9 indios de Tinta "...no han acabado (su trabajo) por que vinieron para dos años".<sup>1384</sup>

Con motivo de la rebelión de Tupac Amaru los indios con cédula o pasaporte comenzaron a ralear. En casi todos los ingenios "...los indios de mita dixeron que ya se les había cumplido el año de su tanda y que se querían regresar a sus pueblos". Pero como no

habían venido los indios de su provincia a servir la mita, los Visitadores les pidieron "se quedaran en calidad de mingas", con la garantía de que se les habría de "pagar antes sus leguajes"; esto último consistente en una suerte de viático. Para hacerlos desistir de su retorno los Visitadores les advertían "...que vieran que si no llevaban pasaportes los matarían los soldados, o se pondrían en peligro de que los mismos indios rebeldes los matarían cuando no quisiesen hacerse a su bando, como lo habían executado con otros mitayos que se habían ido de esta Villa". No bastando con las amenazas de peligros inminentes, los Visitadores les echaban en cara a los indios haberse "...librado de las desgracias que en otras partes estaban sucediendo" y que "...en esta Villa han estado bien tratados y no han padecido lo que en otros lugares de hambre ni persecuciones de los rebeldes, sino que antes han tenido los comestibles en abundancia respecto a otros lugares, donde de hambre han muerto miles de hombres". De resultas de esta particular persuasión los indios "...condescendieron prometiendo no irse y trabajar en el mismo ingenio".<sup>1385</sup>

A pesar de esta intimidación colectiva el ausentismo y la deserción mitaya se hicieron ver notoriamente. De las diez provincias que contribuían contingentes de mitayos a Potosí, cuatro de ellas: Porco, Sica Sica, Azángaro, y Lampa -las dos primeras las más cercanas y las dos últimas las más lejanas- son las que reflejan en forma más fuerte la caída en el servicio de la mita. Con respecto a los de Porco, Buechler (1977) atribuye su ausentismo a que "...la proximidad de sus hogares les proporcionaba una tentación constante de tomar licencias sin permiso".<sup>1386</sup> Con relación a los de Sica Sica, la misma autora lo asigna a que estaban más interesados en menudear coca proveniente de los Yungas que en absolver sus tareas en las minas.<sup>1387</sup> Efectivamente, si cotejamos las cifras desagregadas por comunidad que para esta provincia nos brinda Cole (1985) con las procedentes de las Visitas de Minas e Ingenios de 1781 y 1786 observaremos que Caracollo disminuyó su contribución de mitayos de 43 en 1633 a 8 en 1781, o una baja -si tomamos a 1633 como año base- del orden del 81%; y Sica Sica propiamente dicha redujo su contribución de 30 mitayos en 1633 a 7 en 1786, o una caída del 77%. Con referencia a los de Paria, la razón de su ausentismo Buechler lo atribuye a que eran lo suficientemente prósperos como para comprar su propia libertad. Si para el caso de los Quillacas, una comunidad de Paria, contrastamos las cifras que presenta Sánchez Albornoz (1978) con la que trae la Visita de 1786 veremos que de 12 mitayos presentes en 1692 y 104 ausentes en 1683, en 1786 se presentaron en Potosí sólo 2 mitayos, o una baja, si tomamos a 1692 como el año base, del orden del 83%. Finalmente, en cuanto a los de Cochabamba, ellos eran lo suficientemente perezosos como para ensayar sin ambages la fuga.<sup>1388</sup> Respecto de las otras seis provincias que también contribuían con la mita a Potosí, sólo contamos para fines del siglo XVII con la información procedente de siete comunidades de la provincia de Carangas y cinco de la provincia de Chayanta, hemos podido comprobar tomando como año base a 1692 que Carangas sufrió el impacto de la rebelión con mayor fuerza que Chayanta.

Con relación a las comunidades de la provincia de Carangas, hemos comprobado contrastando la información que trae Sánchez Albornoz con la de las Visitas de fines del siglo XVIII, que cuatro comunidades disminuyen su contribución, dos la aumentan, y una no registra cambio alguno. De las cuatro comunidades cuya contribución a la mita disminuye, el margen de la caída varía en extremo, con Totora registrando la cota más baja y Andamarca la más alta. En efecto, Totora cae de 27 mitayos en 1692 a 22 en 1781 y 1786, o una baja del 19%; ; en Choquicota cae de 27 en 1692 a 18 en 1781 y 1786, o un descenso del 33%; en Collque cae de 75 mitayos en 1692 a 35 en 1786, o una baja del 53%; y en Andamarca disminuye de 45 mitayos en 1692 a 13 en 1781 y 14 en 1786, es

decir una caída del orden del 71%. Por el contrario, de las dos comunidades que registran un ascenso en su contribución, Guallamarca reconoce el alza mas fuerte, y Turú la mas tenue. En efecto, Guallamarca eleva su contribución de 21 mitayos en 1692 a 30 en 1781, o el 43%, y 23 en 1786, o el 10%; y Turú de 21 mitayos en 1692 a 24 en 1786, o el 19%. Respecto a la comunidad que no registra cambio alguno, los Urinocas mantienen su contribución de 15 mitayos tanto en 1692 como en 1786. En promedio Carangas registró entonces en 1786 un descenso del orden del 64%. Por último, con referencia a las cinco comunidades de la provincia de Chayanta, tres registran un descenso en su contribución y dos un ascenso. De las que reconocen un descenso Macha disminuye de 102 mitayos en 1692 a 80 en 1781 y 4 en 1786, o una baja del orden del 27% en 1781 y del 96% en 1786; Punacachi baja de 36 en 1692 a 25 en 1781 y 1786, o una baja del 31%; y Pocoata descende de 105 en 1692 a 66 en 1781 y 10 en 1786, o una baja del 47%. Por el contrario, de las comunidades que advierten un ascenso, Sacacas aumenta de 72 mitayos en 1692 a 89 en 1781 y 90 en 1786, o un ascenso del orden del 24%; y San Pedro de Buenavista aumenta de 15 en 1692 a 25 en 1786, o un alza del 67%. Chayanta entonces promedió en 1786 una baja del orden del 45%. En conclusión, Carangas superó en un quinto la deserción sufrida por Chayanta, una provincia que se destaca por haber logrado sobrevivir la transición del orden colonial y el asalto liberal a sus dominios comunales.<sup>1389</sup>

En los ingenios de Potosí, la rebelión Tupamara, al parecer de Tandeter (1984), no dejó secuelas, siendo los motivos fundamentales que provocaban el ausentismo: los vínculos con la economía campesina expresados en la estacionalidad agrícola (siembra, cosecha). Sin embargo, a juzgar por la Visita de agosto de 1784, que utiliza la connotación de fugitivos y prófugos, el ausentismo mitayo se perpetuó como consecuencia de la rebelión. En el ingenio Jesús María, Fermín Prudencio Pérez expuso en agosto de 1784 que la falta de varios indios es "...uno de los fundamentos por el continuo atraso del trabajo que gobernándose por tres curacas sólo existen dos andando el uno fugitivo con la maior parte de su gente".<sup>1390</sup> En la labor Arenas se declaran en igual fecha 7 mitayos y 53 indios de mita prófugos, aumentando los mingas de 1 en 1780 a 15 en 1781, y a 20 en 1784. En el Ingenio Concepción, de José Montes García, de los 32 indios asignados sólo vinieron en 1784 "...16 indios con sus enteradores que trabajan en la una cabeza y por la otra ha sido preciso trabajar con mingas".<sup>1391</sup> En la labor del Carmen la cantidad de indios mitayos presentes baja de 131 en agosto de 1781 a 52 en agosto de 1784, y en la de Santa María baja de 48 a 7 en iguales fechas. En la labor Santa Gertrudis se registraban 27 indios prófugos. En el Ingenio Cuesta, que arrendaba en 1784 Juan Antonio Fernández Dorado, el ausentismo mitayo fue total desde hacía dos años "...por lo que se tiene librado despacho".<sup>1392</sup>

Cuando amén de ausentarse la mano de obra mitaya debido a la existencia de rebeliones generalizadas, también se ausentaba debido a su participación colectiva en festividades religiosas, los azogueros o bien se resignaban a no contar con mano de obra alguna, o como en el caso de Gregorio Sempertegui, administrador e interventor del Ingenio Alantaña Chico, recurrían a variadas estratagemas para atraerla al trabajo. En este caso, Sempertegui tuvo que afrontar el ausentismo provocado por el Carnaval de Oruro. Para ello apeló al señuelo de ofrecerles gratuitamente ropa y aguardiente, "...para que divertidos estos días, pasen luego después ya gustosos a continuar cada cual el ejercicio que le corresponde".<sup>1393</sup> Esta innovadora argucia fue implementada no sin oposición, "...obstigado con los repetidos clamores de aquella gente de mi cargo, y condezendí contra todo el torrente de mi volunt. mandarles llevar dichas especies, la primera y última vez,

que fue para Carnaval..."<sup>1394</sup> Para justificar su obrar Sempertegui le manifestaba al dueño del ingenio que su aparente prodigalidad fue

"...con el principal objeto de tener sujeta a la Gente aquellos días, y como en efecto con grande admiración de todos los de la Rivera de Sora Sora, conseguí hubiesen trabajado sin que me faltara ningún peón en la Lava, repaso, morterado y otras ocupaciones concernientes a este ejercicio".<sup>1395</sup>

Pero cuando amén de escasear la mano de obra mitaya también escaseaba la mano de obra mingada, los azogueros se veían precisados a parar el trabajo. Esta suspensión del trabajo, era casi siempre, como cuando paraba por falta de agua, por un tiempo determinado. Entre 1803 y 1807, cuando faltó la gente de Mita correspondiente a la Intendencia de Puno (Chayanta), Don Luis de Orueta se vio obligado a parar dos de sus diez cabezas de ingenio.<sup>1396</sup> Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación. Sin embargo, debido a la necesidad de tener que parar dos de sus cabezas de ingenio, las cuentas de Orueta entraron a dar considerables pérdidas. La cuenta y razón de las pérdidas experimentadas por Orueta desde el año 1800 hasta la semana del 27 de junio de 1808, se periodizaron en dos épocas. La primera época duró hasta el 17 de agosto de 1807, lapso en el cual faltó la gente de Mita correspondiente a la Intendencia de Puno, y en que perdió \$111.782. La segunda época duró desde dicho 17 de agosto de 1807 hasta el 27 de junio de 1808 en que perdió \$45.608. Las dos partidas unidas alcanzaron una pérdida total de \$157.391, en el trabajo de ocho cabezas de ingenio. Para 1810, Orueta alegaba haber perdido \$202.335, pero que como había recibido auxilios por valor de \$151.804, en realidad había perdido \$50.531.<sup>1397</sup>

La gente necesaria para el laboreo de minas e ingenios sin mita era a su vez alquilada a los azogueros con mita mediante el pago de rezagos.<sup>1398</sup> El Ingenio Monteros, dotado de mita, estuvo muchos tiempo parado en la década del 90, hasta que en 1797 lo arrendara el Dr. Básquez. Los gobernadores de los aylllos del Repartimiento de Chaqui inferían de este arrendamiento "...no ser la mita tan necesaria a la constitución feliz de la azoguería, cuando no le falta el oportuno y fácil recurso de substituir gentes voluntarias de que abunda aquella Villa...".<sup>1399</sup> Que utilidad resultaba entonces al público, se preguntaban dichos gobernadores, la asignación de indios a un azoguero sin ingenios o con el ingenio parado, "sin proporción para fabricarlos, y cuya notoria escasez indica no ser capaz de sostener esta clase de trabajo ni por un sólo día?". Se creó ser la intención del Rey, se interrogaban a sí mismos dichos gobernadores,

"aprobar el que Don Nicolás Urxainqui [que fuera arrendatario del ingenio Cantumarca] tenga a su disposición 176 indios mitayos para que estos le tributen \$52 cada uno [en rezagos] por no tener ingenios en que emplearlos ni dinero con que pagarlos? Que utilidad resultaba al público de esta servidumbre tan contraria a las disposiciones municipales formadas para el arreglo de la Minería de Potosí?".<sup>1400</sup>

Lo cierto era, y dichos gobernadores lo justificaban plenamente,

"...que la decantada necesidad de operarios viene comúnmente a reducirse a la clase de una sórdida negociación [rezago]. [Era necesario según ellos] no haber

estado en Potosí, ni tener idea del manejo de sus azogueros para no confesar una verdad que autoriza la misma experiencia".<sup>1401</sup>

No es menos incontestable afirmaban entonces los gobernadores

"...que el atraso de estos [ingenios] debe atribuirse con menos fundamento a otros principios que claman por la Reforma y sobre que advertimos indiferente todo el celo del Sr. Intendente. [Tal vez los Ingenios más bien dotados de Mita], "...son los más endrogados cuando por el contrario prosperan otros [ingenios sin mita] a expensas de gentes que voluntariamente se dedican al trabajo [mingas] siempre que una paga corriente asegure el logro de sus fátigas,...sin extraer a toda costa de sus residencias a los indios [mitayos] en donde servían tal vez mas útiles al estado".<sup>1402</sup>

La resistencia de los caciques y curas tuvo también un rol destacable en la creciente escasez de la mano de obra mitaya. Como es de sobra conocido los caciques respectivos manipulaban la lista del despacho anual de la Mita poniendo en la misma a los indios más insolventes, por lo general indios forasteros carentes de asignación de tierra alguna en el ayllu de residencia.<sup>1403</sup> Por el contrario, entre aquellos exceptuados por los caciques de la lista anual estaban: los indios más solventes, por lo general originarios, llamados colquerunas por rescatarse a sí mismo de la mita con dinero; los maraques o yanás por rescatarse a sí mismo con su servicio personal; y los cantores por ser rescatados por los curas.<sup>1404</sup> La exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser exceptuados de la mita la denominaban cutis o cudso por consistir en un sólo año más de descanso, o apanocas por mediar arbitrariamente dinero, que se acostumbraba en el curato de Laimez.<sup>1405</sup> En cuanto a los colquerunas, José Guaraguara, indio originario de la Doctrina de Chayanta, de la parcialidad de Laymez, le expresaba en 1795 al Visitador Manuel José de Vélez, que los de la parcialidad de Collana daban \$82, los de Laymes \$70, y los de Sulcata \$60, "...dejando a los más pobres para que en efecto cumplan su ida a las minas o ingenios de dicha Villa".<sup>1406</sup>

La escasez de mano de obra también obedecía a la presencia de pestes y enfermedades. Cuando entre 1803 y 1807 faltó en Potosí la gente de mita correspondiente a la Intendencia de Puno (Chayanta), uno de los principales motivos denunciados fue la peste.<sup>1407</sup> Por ese motivo Pedro Francisco Arismendi, uno de los azogueros más activos de la Ribera de Potosí, elevó en mayo de 1805 al Virrey Marqués de Sobremonte un Informe donde le manifestaba que ya "...no se encuentran barreteros, apiris, brosirís, mortiris, ni otros peones de este género".<sup>1408</sup> Sin que hubieren bastado como aliciente para quedarse en Potosí el adelanto de sueldos y salarios y los esfuerzos del gobierno para paliar la carestía de los víveres; el hambre, la peste, y la deserción provocaron, según Arismendi, "...una horrible despoblación".<sup>1409</sup> De las 74 cabezas de ingenio que con sus respectivas minas componían el fondo del Gremio de Azogueros, 43 cabezas estaban paradas "...en fuerza de la deficiencia de manos".<sup>1410</sup> En noviembre de 1804 los curas de las Doctrinas de San Agustín de Toledo, Dr. Juan Manuel Roxas y Argandoña; de San José de Poopó, Dr. Julián Pinto y Orihuela; y el de la Doctrina de Challapata, Lic. Matías de Hermosilla certificaron también por separado la escandalosa calamidad que venían sufriendo los indios. Roxas certificaba que la falta de indios tributarios en las minas e ingenios era debida

"...a la peste que a grado en los valles adonde la necesidad los ha precipitado a buscar en ellos su sepulcro...si es que el hambre no les ha anticipado la muerte, o si el mismo sustento no les ha abreviado su miserable vida, alimentándose (en su

propio daño) de una raíz que le llaman Achacana, o de las raíces de la leña, que llaman tola, ...siendo estas como frías tan nocivas, a estos infelices, que al fin finalmente los estenuan, debilitan, y les causan la muerte,...que la miseria y necesidad les obliga a tomar el veneno como triaca".<sup>1411</sup>

Como fruto de una maldición bíblica, Pinto y Orihuela advertía que "las plagas juntas se han unido", incluidas la sequía, el hambre, la peste, y "...últimamente la ruina de sus mineros y poca bondad de sus minas".<sup>1412</sup> La sequía y la esterilidad "...han sido tan espantosas y fatales...que casi no se ha visto en ella el rocío, ni la lluvia". De aquí que los campos y terrenos de la Puna, "...por lo regular áridos, salinosos, y esquilados, tampoco hayan producido sus yerbas y pastos". De la escasez de los pastos "...se han seguido como consiguientes la languidez, la flaqueza, la sarna, y finalmente la mortandad casi total con que han sido exterminados los ganados lanar y vacuno".<sup>1413</sup> Por causa de la achacana y la tola estos curas vieron a "...criaturas de continuo muertas, tropas de indiecitos tiernos huidos desde sus estancias y seno de sus padres, al Pueblo buscando en él el pan y la limosna, y a los más crecidos los vemos pálidos esqueletos y moribundos".<sup>1414</sup> Sin embargo, la credulidad de este último patético relato habría sido puesta en tela de juicio por Manuel Montenegro en carta de octubre de 1804 dirigida al Subdelegado Pedro Cossio, donde le manifiesta que la peste "...no ha hecho mayor estrago en los mozos, si no en los ancianos".<sup>1415</sup>

Finalmente, como último recurso para sobrevivir, le quedaba a los indios la fuga. Por haberse acabado los metales pacos

"...que hacían la mejor y más útil porción de sus minas, y sólo haber quedado en ellas metales negrillos de ley escasa y corta, y de beneficios costosos y crecidos, les han privado a los pobres indios del beneficio de ser pagados por aquellos,...hasta que aburridos los infelices de ver todos los medios inutilizados para mantenerse y pagar sus tributos ha tomado el desesperado remedio de la fuga a lugares extraños e incógnitos".<sup>1416</sup>

Si bien la naturaleza y la etiología de esta epidemia no se conocen es de presumir, por la alta tasa de inmigración de esclavos negros procedentes del África Oriental acontecida en esa época, que la causa fuera la peste bubónica.<sup>1417</sup> Ya en 1719, nos advierte Sánchez Albornoz, la gran contracción demográfica fue producida por la peste bubónica introducida por un buque negrero del Real Asiento de Inglaterra, arribado en ese entonces al puerto de Buenos Aires.<sup>1418</sup>

### **Q-III Crisis del Azogue**

Cuando la Ribera de Potosí paraba, ya no por falta de agua o mano de obra, sino por falta de azogue ¿qué recurso le quedaba, se preguntaba Manuel José de Vélez en 1801, al azoguero o al trabajador?. Los minerales de afuera de Potosí quedaban en igual situación que los de éste, la mayoría parados. Como consecuencia, muchos trabajadores en dichos yacimientos se venían a Potosí, por ser la población "...más pingüe, y de vecinos más pudientes, de quienes, por grado, o por fuerza podían esperar algún socorro".<sup>1419</sup> Sin embargo, en Potosí no les quedaba el arbitrio del capcheo o juqueo, porque "...¿de que le sirve el metal si no hay azogue con que beneficiarlo? De suerte que en las circunstancias del día parecen cerrados todos los arbitrios y recursos, aún para hacer menor el daño".<sup>1420</sup>

En lugares donde existía un Banco de Rescates el precio del azogue y de los insumos claves para la producción de plata, estaban fijados públicamente de forma tal que hipotéticamente estaba garantizado un control que debía impedir el agiotaje.<sup>1421</sup> Sin embargo, Cañete nos revela en el ignorado documento de 1802 que "...muchos azogueros sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del que necesitaban para tenerlo guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que después no podían pagar a los debidos plazos".<sup>1422</sup> Entre esos azogueros figuraba Don Luis de Orueta, quien - a juzgar por la información que nos brinda Buechler (1977)- habría extraído 571 quintales del Banco "para comerciar con una buena parte de él en el partido de Chayanta".<sup>1423</sup> En consecuencia, y para impedir este abuso perjudicial a la Corona y a los propios azogueros, Cañete recomendaba en dicho documento "...que estando corriente el trabajo, se repartiese a cada ingenio de dos cabezas, para reponer el consumo y pérdida, [sólo] hasta 500 libras por mes".<sup>1424</sup> Y en aquellos casos que pidieren a la Superintendencia más azogue de lo estipulado

"...se mande dar solamente lo que corresponda a la mayor Ley de los Metales, y a las labas sobresalientes que hubieren en los puestos, y según esta regla sigan los Maestros las posteriores distribuciones, cobrando su importe por semanas dentro del término de un año con el prorrateo que manda la Ordenanza entre los mancomunados, para cubrir los rezagos, pues en no tomando este temperamento volverán los descubiertos al cabo de algunos años, y será forzoso hacer otra nueva composición."<sup>1425</sup>

Pero en lugares alejados como era el caso de Aullagas, Provincia de Chayanta, donde no existía Banco alguno, los mineros también estaban sujetos al agiotismo de los aviadores, aunque de una forma más directa.<sup>1426</sup> El azogue era adquirido en el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII a precios muy superiores a los de mediados del siglo XVIII. Esta súbita baja del precio del mercurio, auspiciada por la política económica de los Borbones, generó un boom en la producción de plata. El azogue que con las Reformas Borbónicas vino a ser vendido en las Cajas Reales a 60 pesos el quintal, se vendía luego ilegalmente por los mercaderes en calidad de avíos a los mineros de afuera por lo menos a un 50% más caro, no pocas veces a un 100% más caro, y en tiempos de la parada de la Ribera por falta de azogue (1801-02) a un 1000% más caro. Siendo en 1801-02 el comercio de azogues libre a todos, se vendía en las tiendas a 4 y 6 reales onza, o entre 64 y 96 reales libra: carestía que sufrían los mineros pobres, por no tener como comprar un mayto (equivalente a casi un quintal), que costaba \$40. Aunque la Real Hacienda vendía el azogue en 1801-02 por un precio benignísimo de 4 reales libra (o \$50 el quintal), no lo vendía por onzas, ni por libras, ni por arrobas; sino precisamente por maytos. Al no poder comprar los mineros pobres azogue en maytos, ni la Real Hacienda vender el azogue al menudeo, aquellos se veían en la precisión de sufrir la usura del comercio de 4 y 6 reales onza, o lo que es un exceso de 60 reales por libra, igual a un incremento usurario del mil por ciento.<sup>1427</sup>

La monopolización del mercurio en manos de azogueros que mantenían a medio andar sus ingenios les permitió a su vez a éstos especular con la reventa del mismo. A principios de 1785, Pedro José Castellanos, dueño de minas, compró en Poopó 700 libras de azogue a 8 1/2 reales cada una, a un vecino del Cuzco que las trajo de Potosí "...donde pasó a verificar el espendio de algunos géneros que llaman de la tierra". En el mismo año, por el mes de abril, dicho Castellanos compró a Juan Bautista Lariz una segunda partida de

1500 libras a diez reales cada una. En tercera ocasión en el mismo año, Castellanos compró de Don Pedro Jaén, vecino de Oruro, residente en el Mineral de Aullagas, 500 libras a once reales cada una. Por último, en dicho año, el mismo comprador adquirió otra partida de 1500 libras a Don José Albizuri, comerciante de Oruro, a nueve reales cada libra. Tiburcio Gutiérrez, trapichero de Poopó, compró en Oruro a Simón Núñez, minero de Sica Sica, a fines de 1783, cien libras al precio de diez reales.<sup>1428</sup>

El tráfico ilegal de azogue daba lugar a un generalizado ocultamiento así como a negociaciones nocturnas y clandestinas. Contraviniendo a las leyes que prohibían el comercio de un género de estanco como el azogue, el minero Juan Gelly,<sup>1429</sup> al momento del embargo de su ingenio, suspendido por no dar la ley de los metales, sólo se le encontraron 789 libras de las 1800 libras que debían existir en el almacén bajo su custodia. Este vaciamiento ilegal dio lugar a un extenso sumario ante el Justicia Mayor y Alcalde Mayor de Minas iniciado por su ex-socio Ramón Urtizberea. En el interrogatorio que se formulara en 1789 se le preguntó a los testigos

"...si es cierto saben les consta o han oído decir que Don Juan Gelly con motivo de haber tenido a su disposición y advitrio, y en su mismo cuarto todo aquel azogue, usando de mala fe furtivamente y a desoras de la noche lo fue sacando en limetas (que a los conductores les suponía ser de medicamentos de su botica) y de esta forma con otros adbitrios los vendió en el Asiento de Aullagas y otros lugares como sucedió en el de Ocuri que al pasar por allí para Chuquisaca vendió 40 y tantas libras y a su regreso en el mismo Asiento solicitó compradores para venderle el resto de dicho azogue, todo lo cual manifiesta a clara luz la mala versación de la confianza que se le hizo..."<sup>1430</sup>

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra.

## Capítulo I-E-18

### **Escasez de medios de vida en la industria minera colonial.**

#### Índice

- R-I Provisión de bastimentos.
- R-II Cancheros y tambos.
- R-III Servicio de los acopiadores llamados *arquiris*.
- R-IV Abastos surtidos por los indios.
- R-V Rancherías y acopiadores denominados *mañazos*.
- R-VI Agiotismo de los pulperos.

#### **Abstract**

El ciclo de circulación del capital minero en el mundo colonial Alto peruano se realizaba, como es sabido, no sólo mediante la demanda minera de medios de producción

(herramientas, pólvora, y velas), sino también mediante la demanda de medios de vida o de reproducción de la fuerza de trabajo (bastimentos). Esta demanda se sustentaba en una muy alta proporción, sobre el consumo de mercancías producidas; en el caso de los indios mitayos, por las mismas comunidades de origen de dichos indios. Con lo cual el bajo costo del trabajo mitayo, al decir de Portes (1978) y Tandeter (1979), provendría no sólo de la explotación del indio mitayo sino también del trabajo de su propia familia, la cual trasladaba así valor de la esfera de la comunidad de origen a la esfera de la producción minera.

## **Glosario**

arquiri= acopiadores de los cancheros

botija= medida de capacidad equivalente a un quintal de aguardiente

cancha= dueños de estancos de bastimentos

canchero= dueño de cancha

cucho= medida de capacidad equivalente a un octavo de quintal

chalonga= media libra de carne

chuño= papa reducida o deshidratada

embarrar= enjabonar

mañazos= acopiadores de los rancheros

mollete= bodigo de pan redondo y pequeño por lo regular blanco) con que se pagaba a los indios

ranchería= feria de ganado

tambos= depósitos de viñateros

temperamento= clima

## **R-I Provisión de bastimentos.**

Entre los bastimentos a proveer figuraban infaltablemente el aguardiente, el mollete y la coca. Estos medios de vida eran por lo regular provistos mediante la intervención de los Receptores de Alcabalas. En 1809 se registró un caso paradigmático cuando el Gobernador Intendente de La Paz Tadeo Fernández Dávila designó a Manuel Tamayo, Receptor de Alcabalas del pueblo de Pacallo, en la Provincia de Yungas. Apenas ingresó Tamayo, sobrino de Fernández Dávila, a la Receptoría de Alcabalas "...verificó pacto con un Moqueguano para que lo proveyese de aguardientes y repartirlo entre los indios cosecheros de cortas porciones de coca, pero que son muchos en número agregados a las haciendas".<sup>1431</sup> Esta anomalía de designar a su propio sobrino, al igual que en otros numerosos casos (Chulumani, Sica Sica, Sorata), solía provocar la quiebra de la Renta de Alcabalas.

Al servir el aguardiente al indio de precaución y de remedio "...para sufrir la tarea tan inmensa de su trabajo" se volvió también un insumo imprescindible para el beneficio del metal. En el caso mencionado del pueblo de Pacallo Joseph Gonsález de Prusia se preguntaba "...¿cuales no serían los perjuicios que se originarían del recurso de nombrar a un pariente Receptor de Alcabalas?".<sup>1432</sup>

"...El aguardiente lo dará recargado; porque un licor tan apreciado por el Indio, y suministrado al fiado, lo sabe gustoso, y no repararía tampoco en el menor precio a que pactará con él, acaso en la efervescencia de la embriaguez, de darle la coca en

el tiempo de cosecha, consiliando en los extremos de esta negociación de venta, y pago las utilidades más gigantes para sí, con los perjuicios más destructivos para el infeliz Indio".<sup>1433</sup>

Cumplida la negociación de estos efectos por el que tenía el cargo de recaudar la alcabala, es de creer que cuando

"...la usurpe en el todo, entre al partido de hacer los aforos tan rebajados, que siempre le salga la cuenta, pero con perjuicio de la Real Hacienda, de los demás contraídos a este giro, y de los desgraciados indios proveedores de frutos. De la Real Hacienda por el menos derecho que cobra, de otros contraídos a este giro por que no percibiendo los beneficios, sólo el Receptor sabrá proporcionarse, no puede [entonces] hacer su comercio [quien se contraiga a este giro] con la igualdad que exige el equilibrio que debe haber en todos, para que a unos no sea gravoso y a otros lucrativo, con perjuicio de tercero,..Y en perjuicio de los indios proveedores, de carne, manteca, sebos, géneros burdos, lanas, y otros artículos propios de su cría, labranza, e industria porque para indemnizar a la Renta, no sólo se exigirá el derecho de todas estas cosas, de que están exentos estos [indios], dignamente agraciados por las leyes, sino que será con recargación doblemente injusta y con maltratamiento de sus indefensas personas como sucede, cuando reclaman por sus justos privilegios".<sup>1434</sup>

En la venta del aguardiente, en lugar de agio se daba una desigual aplicación del gravamen fiscal -practicado por los arrendatarios del Ramo de la Sisa o siseros, amparados por una legislación colonial- por cuanto entre los pobres que consumían al por menor, el aguardiente se hallaba gravado con unas medidas o sisas llamadas botijas, medias botijas y cuchos,

"...A más de los tres pesos de la sisa [por cada carga que corresponde a un 6%] los compradores de aguardiente habían de pagar al sisero un real por la medida en que se vende el quintal, medio real por el medio quintal, que se llamaba media botija, y medio real también cuando se vendía en cuchos. Estos eran medidas menores donde un quintal se componía de 8 cuchos o 16 medios cuchos, por lo que el sisero percibía medio real por cada medio cucho u 8 reales por un quintal vendido al por menor (en cuchos) entre los pobres, cuando vendido al por mayor entre los ricos percibía sólo un real".<sup>1435</sup>

La coca como el aguardiente era para los mineros y azogueros tan necesarias, que sin ellas, por la rigidez del temperamento (clima), no trabajaban los indios ni en el cerro ni en los ingenios.<sup>1436</sup> El efecto de la coca era tan necesario como el pan, porque el vicio y la costumbre, lo habían conducido a dicho estado de necesidad.<sup>1437</sup> No sólo los indios -que desde antes de la conquista estaban dados a su consumo- sino otros muchos, de distinta casta, vivían al decir de Francisco Canals,<sup>1438</sup>

"...en la constante posesión, de que además de precaverlos de muchos accidentes los vigoriza, conserva las fuerzas, y les suministra suficiente robustez para vencer el trabajo, y resistir las incomodidades, e intemperies. Aún más: no pocos viven persuadidos que ninguna fatiga, bien sea de campo, o bien de minería puede hacerse con perfección y sin que primero hayan tomado la porción que acostumbran de aquella oja",<sup>1439</sup>

De tal suerte era el efecto de esta oja que lo primero que hacía un hacendado, o un minero era

"...arracionar los peones de ella, pues sabido es que de lo contrario no hallaría jornaleros o en caso de tenerlos, no podría obligarlos a ir al trabajo. Ni los campos se labrarán, ni las minas se cavarán si faltase esta oja: Los más, entre los que la gastan, no comen pan, ni carne en muchos meses, pero no pueden pasar un sólo día sin aquella, pues si hay necesidad de promoverse la cría de ganado, y cultura de los campos, y si de ella emana la felicidad como queda dicho, no menos urgente es el fomento de la coca, porque sin ella, ni uno, ni otro se conseguiría."<sup>1440</sup>

Tan alto era el precio de la coca en los yacimientos mineros y en los ingenios de moler metal que su cultivo en las grandes haciendas de la Provincia de Yungas se volvió altamente rentable. De la abundancia de su oferta resultaba que se vendiera más barata,

"De esto, la baja de los jornales, y por consecuencia recta, que las minas se trabajen con más comodidad, y que el cultivo de los campos cueste menos".<sup>1441</sup>

Pero, pese a su alta rentabilidad, su cultivo padecía de grandes inconvenientes. Los hacendados de Yungas necesitaban cosechar la coca, venderla, y reducirla a dinero; y para ello, el costo del flete y la incertidumbre provocada por las inclemencias climáticas y botánicas lo volvían las más de las veces un negocio de alto riesgo.<sup>1442</sup>

Los caldos y frutos se hallaban entonces sujetos a muchas cargas y derechos, como era a partir de 1778 la imposición moderna del 12 1/2 %, con más el 6% de alcabala, puesto que dichos caldos y frutos fueron vendidos en otras partes, más los derechos de pontazgo y sisa, lo cual juntos montaban un 26% o más, sin incluir las expensas necesarias de su conducción o flete, cosecha y mermas.<sup>1443</sup> Era tal el afán de los bodegueros de lucrar con los indios que llegaron a afirmar, con tal que se suspendiera el tributo del 12 1/2 % a los aguardientes, que en aquellos lugares donde no se cobraba "...son los bastimentos más equitativos en su precio".<sup>1444</sup> Para que pagare el impuesto de las medidas de cuchos y medios cuchos, los dueños de los cuatro tambos de viñateros que había, por ejemplo, en La Paz, "...daban órdenes para que a los bolicheros y pulperos se les impidiese el que tengan odres y tinajas de aguardiente ni menos las medidas de cuchos y medios cuchos en el menudeo de sus ventas"<sup>1445</sup> Finalmente, a mediados de la década del 90 el ramo de aguardientes y vinos decayó sobremanera debido a las continuas introducciones que se hacían desde Europa, a menor costo y a precios más acomodados.<sup>1446</sup>

## **R-II Cancheros y tambos.**

En Potosí y Oruro, donde existían numerosos cancheros y tambos de viñateros, el precio de los bastimentos estaba fijado públicamente, de manera tal que se garantizaba un control. La comercialización de los frutos de la tierra en Potosí era reservada a un número restringido de comerciantes locales denominados cancheros. Son los miembros del Cabildo potosino quienes nos describen en 1786, el rol cumplido por los cancheros. Estos eran dueños o arrendatarios de "...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por todo el distrito de la Villa". Cada cancha "...se ha usurpado el fuero de Plaza, y es como una Aduana donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos

comestibles que traen de fuera los mismos labradores o las primeras manos compradoras al tiempo de las cosechas".<sup>1447</sup> Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las canchas (unas casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),

"...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo más gravoso a los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [*arquiris*] por los cantos, y allí les quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso que no a podido extinguir el gobierno que se haya dedicado a este objeto".<sup>1448</sup>

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el Dr. Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor), el Gremio de los Cancheros estancaban en actitud monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de encarecer, y con relación al resto de los productos "...abrían feria a las indias regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". Bien instruidos de la escasez o abundancia de la población, los cancheros

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones, iguales promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella remesa con la seguridad de que cevado el genio ambicioso del indio con esta aparente liberalidad lo buscaría indefectiblemente con todos sus frutos para mantener esta protección que en realidad es una grangería injusta, usuraria y criminal"<sup>1449</sup>

### **R-III Servicio de los acopiadores llamados *arquiris*.**

Cada canchero contaba con el servicio de acopiadores que llamaban *arquiris*. Estos eran "...a manera de alguaciles que salen por los Cantos de la Villa, y se extienden hasta el Baño, Caisa, y otros lugares más distantes con mucho disfraz a hacer represalia de la cebada, frutas, granos, y demás abastos para provisión de las canchas".<sup>1450</sup> El acopio o represalia la practicaban los *arquiris* con métodos compulsivos al servicio de su amo el canchero. "El indio que ve al *arquiri* con el azote en una mano y en la otra con la plata que le ofrece en un despoblado sin recurso a la justicia, y sin conocimiento de su agresor cede al instante escogiendo el menor de los males".<sup>1451</sup>

### **R-IV Abastos surtidos por los indios.**

Entre los abastos surtidos por los propios indios también figuraban las materias primas necesarias para la reproducción del ciclo de trabajo minero tales como el carbón, el sebo, el algodón, la ceniza, los baldes, el *ijchu* o paja de la puna, los carneros de la tierra (llamas), y la taquia o estiércol de las llamas, por lo que se los conocía como productos del "comercio de indios". Por dicha provisión los indios eran escasamente recompensados, y las más de las veces expropiados. A esta lista hay que agregar la sal, la cual era cargada en costales por los indios desde las salinas hasta los ingenios.<sup>1452</sup> Respecto a este insumo, tan apreciado por los azogueros, un enterador de indios de mita expuso en una ocasión que al indio se le había quitado la sal que traía, mediante violencia, "...y se le había pesado [la sal] a 5 arrobas y 5 libras por quintal [es decir a 30 libras demás], debiendo ser de a 4 arrobas, y que importando \$16 sólo le había dado seis".<sup>1453</sup> En otras palabras, que no sólo le expropiaba \$10 por cada quintal de sal sino que también le gravaba cada quintal con un

30% más de yapa. A más de ello, los baldes que los indios debían dar para el trabajo les eran retribuidos, según lo expuesto en una de las Visitas de Ingenios, a razón de dos reales plata.<sup>1454</sup> También expusieron los indios en dicha Visita, que en el Ingenio Chaca, que arrendaba Juan de Peñarrubia, les hacían comprar a los indios "ceniza para secar las masas y embarrar [enjabonar] las piñas."<sup>1455</sup>

#### **R-V Rancherías y acopiadores denominados *mañazos*.**

La comercialización del ganado mayor y menor era también reservada a un número pequeño de comercios locales llamados Rancherías, y de acopiadores denominados *mañazos*. El auge en que se vieron las minas cuando se descubrieron, atrajo a esos puntos muchos españoles y personas acomodadas que pagaban bien las reses, y no podían habituarse a la carne del carnero de la tierra (llama). Estas últimas (las llamas), ingresaban en el orden de los cincuenta mil anuales, con sus naturales oscilaciones estacionales, a razón de cinco llamas promedio cada indio, y según Salinas y Córdoba (1630), se consumían enteramente en la Villa.<sup>1456</sup> Por consiguiente, a cierto número de los denominados *mañazos* se les obligaba a proveer de carne de cordero de oveja, a las Rancherías de Carangas y la Rivera de Potosí. Aquella utilidad que les pudo haber traído ésta provisión, antiguamente habría sido rentable, y retributiva del inmenso trabajo con que los indios salían a parajes distantes a acopiar este ganado y conducirlo a ambas rancherías. Pero a comienzos del siglo XIX, al producirse la crisis minera, faltar enteramente el aliciente de las minas, y al no quedar en Carangas, debido a la extinción de las Cajas Reales, español alguno a excepción del Ayudante de Cura, escaseaban por demás los consumidores de cordero de oveja. Más aún, debido a que los habitantes y naturales del país estaban habituados, y no hacían otro consumo de carne, que la de los corderos de llamas, los cuales eran de cría de los indios y en consecuencia exentos de todo gravamen, existió un excedente de corderos de oveja, y por ende una profunda baja en su precio.<sup>1457</sup>

#### **R-VI Agiotismo de los pulperos.**

Pero en las labores de metal, lejos de los ingenios, donde no existían cancha, tambo, ni ranchería alguna, los indios estaban sujetos al agiotismo de los pulperos y bolicheros. En 1781 se comprobó que mientras en Potosí, el mollete (bodigo de pan redondo y pequeño por lo regular blanco) con que se pagaba a los indios, estaba a cinco unidades el medio real, en las labores de metal se les pagaba sólo a razón de cuatro molletes cada medio real. Igual agiotismo sufrían los indios con el consumo de la coca, el ají, el maíz, el aguardiente, el chuño (papa reducida o deshidratada), y las chalonas (media libra de carne) que se expendían en las pulperías. Sólo ocasionalmente los Visitadores multaban a los dueños de las minas al descubrir dicho agio. Con motivo de esta especulación, los indios reclamaban que los arrendatarios de minas e ingenios no exigieran de los pulperos renta alguna por cuanto "...lo que por esta razón paga lo resarza de los indios con sus depravados fraudes".<sup>1458</sup> En casos extremos, como el de Porco, la inexistencia de canchas, y tambos que proveyeran de bastimentos, llegaba incluso a parar las labores y los ingenios. En el ingenio Concepción de Cari, en Porco, al ser conminado su dueño Juan Reynolds, porqué motivo no trabajaba y mantenía activo (llevaba corriente) su molino, lo cual iba en perjuicio de la Real Hacienda, sostuvo que el no correr dicho ingenio en su trabajo "...era por no tener bastimentos para sostener y alimentar a los trabajadores, pues aunque había practicado varias diligencias a su consecución a fuerza de plata no se podían encontrar [bastimentos]..."<sup>1459</sup>

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no tan sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, y la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra, sino también a la escasez de bastimentos (aguardiente, mollete, y coca).

## **Epílogo Sección I-E**

En cuanto a la construcción de un enclave minero, hemos constatado que el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del costo en mano de obra se practicaba multiplicando el número de mingas contratados por el jornal semanal de 35 reales. Como el metal refinado era el producto del repaso de los indios, durante un promedio de tres semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra por tres. Más como el producto de tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la Visita multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si se dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de cajones producido semanalmente. El costo promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-II) alcanzaba entonces a 233 pesos semanales en cada uno de los doce ingenios estudiados, lo que a una producción promedio de 38 cajones semanales redondeaba los seis pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno de los mismos (columna XV de Tabla C-II).

La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta en el negocio minero debía contemplar no sólo los costos de producción sino también los costos de inventario. Estos últimos comprendían la diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba que los stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora, velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto.

## **Sección I-F**

### **Patrimonialización de una administración venal**

Así como hemos investigado en las secciones anteriores los mecanismos de articulación política, social, y económica de una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista, en esta nueva sección habremos de centralizar nuestro interés en las relaciones etnológicas de naturaleza política tales como los procedimientos burocráticos de venta y adquisición de los oficios públicos. En esta sección, dedicada a investigar la patrimonialización de un estado subordinado, trato en cinco capítulos consecutivos el análisis de la venalidad de los oficios capitulares, el poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes, el patrimonialismo en el régimen de personeros y levass de la milicia, el reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica, y las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social

## **Capítulo I-F-19 Venalidad de los oficios capitulares.**

### **Índice**

- RR-I Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial
- RR-II Cargos venales.
- RR-III Provisión de Corregimientos de Indios.
- RR-IV Cargos capitulares puramente electivos.
- RR-V Ciudades alejadas de las rutas comerciales.
- RR-VI Discriminación contra pobladores foráneos.
- RR-VII Pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.
- RR-VIII Condición de solvencia.

### **RR-I Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial**

Para una corriente historiográfica, representada por González Muñóz y Martínez Ortega (1989), quienes analizan la elite nativa de Mérida (Yucatán), lo que determinaba que --a diferencia del cabildo de Valladolid (Yucatán)-- su cabildo estuviera oligárquica o nepóticamente controlado no fue sólo la intensa endogamia o consanguineidad practicada por los grupos dominantes sino las numerosas subastas de oficios públicos consumadas. A semejanza de Mérida, en las provincias del Río de la Plata, el incesante aluvión de comerciantes y funcionarios peninsulares que comenzó a radicarse a partir de la Paz de Aquisgrán (1748) y la formación del Virreinato (1778), amén de debilitar la naturaleza patricéntrica de los patriciados locales, volviéndolos más cognáticos,<sup>1460</sup> provocó al decir de Barbier (1972), una oferta ampliada de empleados en la administración secular, militar y eclesiástica. Esta oferta ampliada amenazó seriamente a las elites locales, por un lado con sufrir una movilidad social descendente, y por otro con aumentar sus oportunidades de contraer matrimonios con miembros de la burocracia.<sup>1461</sup> Este desigual alud inmigratorio hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a los Cabildos seculares, las Milicias y los Capítulos de las Ordenes Religiosas.

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, la subasta pública de cargos capitulares y corregimientos debilitó o no el profundo localismo reinante y la consiguiente endogamia de las elites locales al incorporar a mercaderes foráneos, facilitando así las políticas centralizadoras y

patrimonialistas, sin perjuicio de considerar más adelante la incorporación de individuos de dudoso origen racial o de sospechosa legitimidad. Asimismo, nos preguntamos en este trabajo si la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se adquirían cargos capitulares, contribuyeron o no a fortalecer una presión patrimonialista y señorial. Si bien Moore (1976) considera que en Francia las Reformas Borbónicas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou pudieron haber evitado la Revolución, esta hipótesis difícilmente es aplicable a los territorios coloniales de España. Para el tipo de ciudades-estado de naturaleza patrimonialista hemos tomado los casos de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta. Asimismo, nos preguntamos si en los Cabildos de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata del período borbónico --alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- las elecciones concejiles acentuaban o no el localismo reinante, debilitando las políticas centralizadoras e intervencionistas de los Borbones. Para este tipo de ciudades hemos tomado los casos de Corrientes, Santa Fé, Asunción, La Rioja, y Santiago del Estero.

La secular lucha en el seno de las elites coloniales por alcanzar los asientos concejiles, por reducir el precio de los arrendamientos de los ingenios, por rebajar o condonar las deudas contraídas por los azogueros, por reducir la tasa de interés de los censos y capellanías o por conducir el Situado Real, reflejaba las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Estas contradicciones se habrían montado a su vez sobre las contradicciones desatadas en las luchas insurreccionales o guerras de liberación nacional. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas que los azogueros habían contraído con corregidores, mercaderes y oficiales reales, a exponer en este ensayo, reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma. Ello era así porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros dependía de los sobreprecios que las burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados, imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.<sup>1462</sup> La lucha por el control de las Cajas Reales y de la Compañía de Azogueros, entre los mismos Mercaderes de Plata, también reflejaría las contradicciones por la renta minera.<sup>1463</sup>

A la luz de estas hipótesis, el conflictivo desempeño de la actividad capitular habría obedecido a la resistencia que las facciones mayoritarias de los Cabildos oponían a las políticas patrimonializadoras del estado absolutista en desarrollo.<sup>1464</sup> La venta en subasta pública --y consiguiente hereditariiedad-- de las Oficialías Reales, las Regidurías Perpetuas y los Corregimientos de Indios; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares; la renuncia nepótica de los oficios públicos; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; el control capitular y eclesiástico de censos, capellanías y obras pías; y la discriminatoria selección de quienes se beneficiaban con la conducción del Situado Real habrían jugado un rol determinante en la gestación de situaciones conflictivas. En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron en las elecciones de los alcaldes ordinarios, así como las luchas por la venta de los Corregimientos de Indios, las Oficialías Reales y las Regidurías Perpetuas. De entre estas últimas surge la sugestiva hipótesis si en los Cabildos, con una campaña anti-patrimonialista o democratizadora, se hubiera evitado la revolución de independencia. Para estudiar estas luchas hemos recogido una treintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en los Archivos Históricos de Córdoba y Mendoza.<sup>1465</sup>

## RR-II Los cargos venales.

En aquellas ciudades que eran nudos del tráfico comercial de larga distancia, al subastarse los cargos públicos al mejor postor, o en el sentido propuesto por Hernández Benítez (1986) 'al venderse poder', el intenso localismo reinante no se habría debilitado, por cuanto los adquirentes de dichos cargos, por lo general ricos comerciantes peninsulares o residentes de los puertos de América, ligados al comercio a larga distancia, se entroncaban matrimonialmente con las elites nativas, y patrimonialmente con las instituciones de la Iglesia Católica.<sup>1466</sup> Era en tiempos de bonanza minera, que las regidurías perpetuas y las oficialías reales se cotizaban a los precios más altos. En dichas ocasiones, los cargos electivos como el de los alcaldes ordinarios --los que realmente garantizaban la autonomía de los Cabildos por ser cargos de justicia que no podían enajenarse-- eran una minoría comparados con los cargos venales, como el de los Regidores perpetuos. Por ejemplo, en Potosí, los adquirentes de los cargos públicos venales eran ricos comerciantes porteños o peninsulares, ligados al comercio a larga distancia.<sup>1467</sup> En 1795, Juan de Ybieta y Endeyza,<sup>1468</sup> adquirió el nombramiento de Teniente Sostituto de Contador en \$6.000.<sup>1469</sup> Más luego, en 1797, se lo vio al porteño Manuel Obligado detentar en Potosí la Alcaldía de primer voto.<sup>1470</sup> En Salta, los hermanos Juan Adrián,<sup>1471</sup> Dr. Pedro Vicente,<sup>1472</sup> y Antonio Fernández Cornejo,<sup>1473</sup> originarios de Moquegua, aunque nacidos en Tacna,<sup>1474</sup> adquirieron, en 1778, las varas del Cabildo de Salta.<sup>1475</sup> En Córdoba, el Gobernador Interino Joaquín de Espinosa y Dávalos,<sup>1476</sup> para contrarrestar el poder del clan hegemonizado por la familia Echenique, al que pertenecía el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>1477</sup> consolidó el bloque de poder de los Allende subastando los oficios de regidor y los grados militares de General,<sup>1478</sup> en Tomás de Allende y Losa,<sup>1479</sup> y José de Allende y Losa,<sup>1480</sup> y sólo los de Regidor en Santiago de Allende y Losa,<sup>1481</sup> en su primo hermano Antonio de Allende y Villamonte,<sup>1482</sup> y en José Prudencio Xijena,<sup>1483</sup> siendo los tres últimos librados recién en 1772.

En cuanto al notariado su valorización dependió de la intensidad de la actividad comercial. Socolow (1987) nos ha relatado como las escribanías públicas de Buenos Aires se fueron valorizando desde 1727 en que se cotizaron en \$475, para remontarse un 50% (\$600) en 1749, al triple (\$1.300) en 1762, siete veces (\$3.500) su primitivo valor en 1774, y una vez declarada la Paz de Versailles, en 1785, una docena de veces (\$6.000).<sup>1484</sup> La creación en Buenos Aires, a partir de la Paz de Utrecht (1713), de los registros números dos (Merlo) y tres (Esquivel); y a partir de la Paz de Aquisgrán (1748), de los registros cuatro (Gorordo), cinco (Ferrera) y seis (Vásquez Pelayo), nos revelan la palmaria influencia de la actividad mercantil desatada luego de dichos acontecimientos.<sup>1485</sup> También se reveló esta influencia en el interior del espacio colonial, luego de las regulaciones de Libre Comercio de 1778, cuando en San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y Cochabamba se manifiesta la necesidad de crear nuevas escribanías.<sup>1486</sup>

La vinculación patrimonial con la Iglesia se daba a través de capellanías y memorias pías. En Buenos Aires, la clase política registró una quincena de casos donde los regidores perpetuos habían fundado capellanías y memorias pías, sobresaliendo en ello Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega, Gaspar de Santa Coloma, Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa.

A medida que las autoridades capitulares sufrieron el proceso de patrimonialización gestado por las Reformas Borbónicas el precio de los oficios concejiles se fue depreciando. La venta de los oficios habría consolidado los bloques de poder locales debido al exclusivo rol jugado por la renuncia de dichos oficios, equivalente a una suerte de arrendamiento de los mismos. En 1786 el Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José Morcillo Baylador renuncia el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras dure la minoridad del hijo lo renuncia en Juan de Pereda y Morante.<sup>1487</sup> En Salta, el Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui había heredado el oficio de un tío suyo.<sup>1488</sup> De igual manera, en Buenos Aires, renuncian sus oficios en 1759 el Regidor Juan de la Palma en su hijo;<sup>1489</sup> en 1761 el Alguacil Mayor Antonio de la Torre en su cuñado Luis Aurelio de Zavala;<sup>1490</sup> en 1789 el Escribano público y de Número Martín de Rocha en su hijo Juan José Rocha;<sup>1491</sup> en 1787 el Escribano José García de Echaburu en su hijo Mariano;<sup>1492</sup> en 1793 el Alcalde Provincial Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio Mantilla;<sup>1493</sup> en 1795 el Escribano Público y de Número Eufrasio José Boyso en su hijo Tomás José Boyso;<sup>1494</sup> y en 1816 el Escribano Inocencio Antonio de Agrelo en su hijo Marcos Leonardo de Agrelo.<sup>1495</sup> En Santiago del Estero el Alcalde Provincial Roque López de Velazco renuncia su oficio en su hijo José Antonio López de Velazco,<sup>1496</sup> y en San Juan, en 1797, renuncia el Regidor del Cabildo Pedro Sarmiento de Quiroga.<sup>1497</sup>

### **RR-III La provisión de Corregimientos de Indios.**

En cuanto a la provisión de los Corregimientos de Indios, a diferencia de las Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.<sup>1498</sup> De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos estaban a cargo de sus repartimientos forzosos. La abolición de los repartos mercantiles, que ocurrió luego de la Rebelión de Túpac Amaru, perjudicó no sólo a los Corregidores, sino también a la clase azoguera altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por aquellos. Gran parte de las operaciones de crédito entre comerciantes y corregidores era concertada en Buenos Aires mismo. En el Apéndice E-I constatamos que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir hacia su destino.<sup>1499</sup> Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos corregidores, acuciados por el desfase entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la defraudación y el cohecho.<sup>1500</sup> En carta a José Santos Díaz y Herrero, Francisco Gutiérrez de Cevallos le agradecía en 1777 "...la oferta que V. M. me franquea de escribir a Madrid a Dn. Domingo Sánchez Barrero para que promueva la instancia sobre el Corregimiento de mi hermano Dn. Juan González, en la inteligencia de la prompta entrega de los mil pesos de a 128 quartos".<sup>1501</sup> Ni lerdo ni perezoso, el mismo día, Gutiérrez de Cevallos le escribe a Sánchez Barrero diciéndole que "...José Santos Díaz y Herrero me escribe diciendo comisionaría en esa corte, sugeto que entregase a V. Md. los 4 mil pesos consavidos por el Corregimiento que solicita mi hermano de que me persuado aia también prevenido a V. M.". <sup>1502</sup> Tres meses más tarde, Barrero comunica su conformidad con la entrega de los 4 mil pesos "...conseguida que aia la gracia del Corregimiento a favor de mi hermano González".<sup>1503</sup> Por su peculiaridad los casos de Antonio de la Calzada y el General Antonio de Rueda ya fueron resaltados en otro capítulo de esta obra. También fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los corregidores por sus relaciones con los Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el Corregidor de la Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fue acusado de estar coludido con

Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano o Seoane, cerrándole los estancos.<sup>1504</sup> Y con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fue el del Corregidor de la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más de \$7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.<sup>1505</sup>

Una vez abolidos los corregimientos, pareciera ser que se confirma la hipótesis de Pérez de Tudela (1989), por cuanto se presume que los sueldos de los Subdelegados de Real Hacienda tampoco alcanzaban para subvenir las necesidades más apremiantes, pues muchos de estos últimos, a juzgar por el Apéndice A, se endeudaban con comerciantes porteños para más luego recaer en defraudaciones y cohechos.<sup>1506</sup> Fue notorio el caso del Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,<sup>1507</sup> quién con la complicidad de los Tesoreros José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de Carabaya en provecho propio, en el orden de los \$50.000.<sup>1508</sup> Otro caso muy sonado fue el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de Grandier, fue culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en \$10.714.<sup>1509</sup> Pero también hubo otros casos que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo Gregorio de Castilla,<sup>1510</sup> y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñoz Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por \$84.968;<sup>1511</sup> la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por \$5.100;<sup>1512</sup> la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;<sup>1513</sup> la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de \$31.528;<sup>1514</sup> la de la Renta de Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por \$8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por \$1.107.<sup>1515</sup> En el caso de la Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente desfaldo de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".<sup>1516</sup> En el caso de la Caja de Carangas, Muñoz Villegas, confesaba que la quiebra fue el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".<sup>1517</sup> A su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".<sup>1518</sup>

#### **RR-IV Los cargos capitulares puramente electivos.**

Aún los cargos capitulares puramente electivos, como requerían de ingentes gastos, se volvían en la práctica oficios venales. En Potosí, advertido de la postulación a Alcalde de Felipe Santiago de Arce,<sup>1519</sup> Rafael de los Reyes y Serrano,<sup>1520</sup> apoderado de Francisco Álvarez Campana,<sup>1521</sup> pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entré y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les

manifesté, le atrasaban más con dicha elección porqué aún cuando se moderase en los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000 pesos".<sup>1522</sup>

Y en Córdoba, cuando en 1784 le otorgaron la vara de Alcalde de primer voto a Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama,<sup>1523</sup> éste último confesó que la vara

"...me costó muchos pesos, respecto a mis posibles; pues con la institución de nuevo Gobierno a Córdoba, su recibimiento, fiestas, etc., el compañero alcalde de 2o. voto, de más rasgos o de mas posibles, me obligó a entrar en el aro a no poder más".<sup>1524</sup>

En cuanto al Cabildo de Santiago del Estero, su composición de fuerzas también se revirtió, en ocasión de las Reformas Borbónicas, más exactamente en 1789, a favor de un grupo de peninsulares, propietarios de varas concejiles adquiridas en pública subasta y aliados del Gobernador-Intendente de Salta. Ellos estaban encabezados por Juan José de Erquicia,<sup>1525</sup> y seguidos por Nicolás de Villacorta,<sup>1526</sup> y Bartolomé Francisco de Maguna.<sup>1527</sup> Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario, y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Tan aguda fue esta concentración de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo de Rueda,<sup>1528</sup> el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades".<sup>1529</sup>

Acusado entonces Bravo de Rueda de haber insultado echando a la mierda a un Alcalde, se excusó arguyendo que él [Bravo de Rueda] "...tenía también jurisdicción, y mayormente cuando su genio no le permitía aguantar ni tolerar".<sup>1530</sup> Un año más tarde, en 1790, el Alférez Real Bravo de Rueda solicitó que en todos los años se elija el número completo de seis regidores.<sup>1531</sup>

El conflicto que se suscitó seis años después, en las elecciones de 1796, obedecía a que el Regidor Propietario Juan José de Erquicia "...tuvo la osadía y arrojo criminal de despojar al Alcalde Ordinario de primer voto [Alonso Araujo] del voto activo en las elecciones del primero de enero".<sup>1532</sup> Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia

"...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774 expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de justicia".<sup>1533</sup>

En los cabildos de las capitales, esta práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o enfermando los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a. en otro".<sup>1534</sup> La acumulación de varas fue tan comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que

repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva Elección".<sup>1535</sup> Asimismo, tan consistente y reiterada por años fue la oposición encabezada por el Alférez Real Bravo de Rueda, que el día en que se celebraron las elecciones de 1796, uno de sus rivales, de la facción liderada por Erquicia, le convidó con un mate, de resultados del cual falleció repentinamente, aparentemente envenenado. El 11 de febrero de dicho año, la mujer de Bravo de Rueda, María Roberta Zuasnábar,<sup>1536</sup> le solicitó al Gobernador la formación de una Comisión Investigadora del crimen cometido. Cuatro meses después, el 11 de junio de 1796, se vió obligada a denunciar al Virrey que el Gobernador de Salta no daba cumplimiento a las Providencias dictadas por él para el esclarecimiento y castigo del crimen.<sup>1537</sup> Dos años después, en 1798, se suscitó un nuevo conflicto, pues habiendo fallecido el Alcalde Ordinario de segundo voto Francisco López de la Madrid "...se encargó Erquicia como Regidor propietario de la vara, y haciéndose elección de oficios en enero de 1798, se pasó de propia autoridad [Alcalde de segundo voto] a ser Alcalde de primer voto".<sup>1538</sup> Esta maniobra fué posible debido a que Erquicia había creado el cargo "...de regidor suplente en contravención de la regalía de esta Ciudad y de lo dispuesto por Real Provisión de rigurosa observancia".<sup>1539</sup> Con esta artimaña, Erquicia había designado a Domingo Iramain de Regidor suplente y al mismo tiempo de Alcalde Ordinario, "...retribuiéndole Iramain la condescendencia de que pasase aquel [Erquicia] al depósito de la vara de primer voto".<sup>1540</sup> Esta serie de procedimientos irregulares probaba, a juzgar por lo declarado en 1799 por los Alcaldes de primero y segundo voto José Yspizúa,<sup>1541</sup> y Santiago García del Villar,<sup>1542</sup> "...que los Regidores suplentes son Parciales declarados con el único Regidor de este Ayuntamiento [Erquicia]".<sup>1543</sup> También probaba que los Regidores suplentes eran parciales "...igualmente entre sí, porqué no se dará ejemplo que se hayan dibidido en botación alguna de las muchas a que han concurrido".<sup>1544</sup> La Parcialidad de Erquicia y sus repetidas conexiones dieron mérito a que "...se hayan declarado nulas por el Superior Gobierno, las [elecciones] practicadas por ellos en los años de 96, 98, y 99".<sup>1545</sup>

En Montevideo, a fines del siglo XVIII, Mateo Vidal adquirió el oficio de Alférez Real; Ramón de Cáceres,<sup>1546</sup> y José Matías de Ortega,<sup>1547</sup> el de Alguacil Mayor; y Juan Antonio Bustillo de Zevallos --el mismo que en 1750 había celebrado un contrato social por \$300.286 con Manuel de Escalada y Antonio de Rueda, en efectos que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María, y José-- compró la vara de Alcalde Provincial.<sup>1548</sup> En Corrientes, a mediados del siglo XVIII, las varas concejiles revirtieron a favor de un grupo de peninsulares adinerados, ligados al comercio de la yerba mate, conectado con la Compañía de Jesús, como Nicolás Patrón y Centellas,<sup>1549</sup> José de Acosta y López Lisperguer,<sup>1550</sup> y Ziprián de Lagraña.<sup>1551</sup> En una presentación hecha en el Cabildo de Corrientes en 1757, Don Sebastián Casajús,<sup>1552</sup> manifestaba que Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento".<sup>1553</sup>

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".<sup>1554</sup> Más aún, Don Sebastián le expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".<sup>1555</sup> Un año

más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda,<sup>1556</sup> le expresaba al Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastián Casajús, que "...aquí no se vé más ley ni razón que la pasión de los que mandan, aunque sea contra toda razón, ni ai quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".<sup>1557</sup> Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".<sup>1558</sup> Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las autoridades] a maliciar de lo que hablan".<sup>1559</sup> Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí, sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los coxan por enemigos".<sup>1560</sup>

#### **RR-V El caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales.**

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial, los cargos concejiles no pudieron subastarse por carecer de postores. En el caso de Asunción del Paraguay, el Gobernador-Intendente se propuso en 1785 hacer electivos los oficios concejiles por no haber persona que los quisiera rematar en propiedad.<sup>1561</sup> Y en el caso de La Rioja, esta ciudad no podía en 1786, a juicio del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte, mantener Cabildo, "...porque hace años que se compone de los dos Alcaldes ordinarios y el Procurador, sin esperanza de que lleguen a ocuparse las Plazas de Regidores".<sup>1562</sup> Por dichos motivos, Sobremonte le pedía al Virrey Marqués de Loreto que no hiciera caso de aquellos Riojanos que, como Francisco Dávila y Doria,<sup>1563</sup> y Manuel del Rincón y Escudero,<sup>1564</sup> pedían excusarse de aceptar los cargos para los que fueron elegidos, pues no había

"...más que tres sujetos libres de excepciones y de proporcionadas facultades a quienes pueda elejirse de Alcaldes, y siete asimismo libres de dichas excepciones pero pobres de facultades para poder responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".<sup>1565</sup>

Aquellos pocos vecinos libres de excepciones, que como todos los vecinos de las colonias españolas, contaban con privilegios pero no con derechos, hacían lo imposible por libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, pergeñaron el ardid de incorporarse a aquellos oficios, como la Maestría de Postas, que estaban exceptuados de las cargas públicas.<sup>1566</sup> Dávila y Doria, que era uno de los más distinguidos de aquella ciudad, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para emanciparse de los cargos concejiles y del servicio militar había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca".<sup>1567</sup>

#### **RR-VI La discriminación contra los foráneos.**

La discriminación contra los foráneos o extranjeros era alimentada en este tipo de ciudades por el intenso localismo así como por las prácticas endogámicas vigentes en ese entonces. Esta discriminación cumplía un rol inmovilizador en la estructura social colonial, alcanzando no sólo a los Europeos no españoles, sino incluso a aquellos americanos procedentes de otras regiones o localidades. En las elecciones del Cabildo de Mendoza, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,<sup>1568</sup> y Juan Martínez de Soto y Rozas,<sup>1569</sup> el Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".<sup>1570</sup> En las sesiones preliminares de las elecciones del Cabildo de Santa Fé, ocurridas en Diciembre de 1788, Juan Francisco Aldao,<sup>1571</sup> había tachado a José Ignacio Uriarte,<sup>1572</sup> por su condición de foráneo, y preferido para Alcalde de primer voto a Francisco J. Crespo,<sup>1573</sup> por ser este último patricio. Sin embargo, en un largo escrito elevado al Gobernador de Buenos Aires, José Arias Troncoso,<sup>1574</sup> José de Vera Múxica y José Manuel Troncoso,<sup>1575</sup> integrantes de la vieja facción de los Echagüe, los Maciel y los Vera, alegaban que el mismo Aldao había nombrado de Alcaldes en 1785 y 1786 a Gabriel de Lassaga y Gamboa,<sup>1576</sup> y a Manuel de Toro Villalobos,<sup>1577</sup> "...que han sido tan foráneos como lo es José Ignacio de Uriarte, si se pueden llamar tales, por ser Europeos casados con patricias".<sup>1578</sup> Si nunca en aquellas votaciones "...consideró [Aldao] esta qualidad por impedimento para obtener las varas...¿porqué --se preguntaban los firmantes del escrito mencionado-- prevarica ahora objetando por tacha lo que antes no lo fué en su concepto?".<sup>1579</sup> Por último, dichos firmantes agregaban que

"...por más foráneo se debe tener, respecto de esta ciudad [Santa Fé], a Francisco Crespo que a José Ignacio Uriarte..., [pues] el primero es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuja parte se ha pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en los jueces de aquí, jurisdicción ni autoridad".<sup>1580</sup>

Por el contrario, para dichos firmantes

"José Ignacio Uriarte la reconoce, vive en esta ciudad y está casado aquí, y tiene la casa propia de su mujer, luego se debe decir con mejor fundamento, que Don Francisco Crespo es más foráneo respecto desta ciudad que Don José Ignacio Uriarte".<sup>1581</sup>

El concepto que esta facción de los Maciel y los Vera tenían de Crespo lo ilustra con demasía el contenido de la carta que José de Vera Múxica enviara al Virrey Marqués de Loreto en diciembre de 1788, en la cual le expresaba que Crespo

"...hase muchos años se retiró a su desierto [Nogoyá] en aquella otra vanda [Entre Ríos] vivió mucho tiempo, escandalizando aquel partido con la ilícita amistad que cultivaba, con la que después tuvo por suegra",<sup>1582</sup>

Cansado de dicho concubinato, intentó luego "...casarse con una hija de la misma concubina",<sup>1583</sup> a lo cual se opusieron sus parientes por la desigualdad social de la contrayente.<sup>1584</sup> Por último, en Río Cuarto, el Regidor Defensor General de Pobres, fiel a la política centralizadora de los Borbones, hizo presente en 1803 al Virrey del Pino que el Defensor de Menores Don Pedro López, inflamado de localismo, tuvo "...varias expresiones insultantes, y entre ellas algunas de amenazas a los que para Alcalde Ordinario diesen su voto a Persona Europea, dándoles a estas el título de intrusos, y no dignos de gobernar a los Patricios".<sup>1585</sup>

Pero las elecciones periódicas de los alcaldes ordinarios no eran garantía de paz y concordia. En 1739, en Santa Fé, Corrientes y Montevideo, tan intensas eran las disputas en ocasión de las elecciones concejiles, y tal el abuso de los Oficiales Reales de la Real Hacienda en lograr ser electos, que el Gobernador de Buenos Aires solicitó al Rey se aboliera por completo las elecciones.<sup>1586</sup> Y en 1786, en Mendoza, el sistema político se limitó aún mas. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a sólo las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad, promoviendo automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de segundo voto en la elección del año anterior.

En ciudades marginadas de las más importantes rutas comerciales, como La Rioja y San Juan, al no existir subastas públicas de cargos capitulares, un mecanismo idóneo para perpetuarse en el poder consistía en acordar, por consenso o contrato formal, la designación en los cargos concejiles de parientes que les devolvieran la vara al cabo de un período. En La Rioja, las casas patricias evitaron la lucha fratricida celebrando en 1708, y ratificando en 1781 concordias o pactos, que acordaban su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.<sup>1587</sup> Otro mecanismo de perpetuación consistía en entorpecer las elecciones comunales con impugnaciones posteriores al acto de calificación de votos, de manera tal que las varas quedaran en depósito en aquellos que ya las detentaban.<sup>1588</sup> En San Juan, las elecciones anuales de oficios concejiles las obstaculizaba en 1802 el Alférez Real José Ignacio Fernández de Maradona,<sup>1589</sup> "...para que formándose pleyto sobre nulidad se perturbasen la confirmación de elecciones para que la vara cayese en depósito en su persona, pasándose todo el año muchas veces sin poderse concluir el juicio de nulidad".<sup>1590</sup> Tanto se habían multiplicado las demandas de nulidades de elecciones en San Juan y otras ciudades, que la Corona

"...se vio precisada a circular un auto por el que se mandó no se depositasen en adelante varas de justicia en los Alférezes Reales, si se eligiesen de nuevo los oficios por los Ayuntamientos, y ese fué el único modo con que se cortó este inconveniente gravísimo y tan contrario a la quietud de los pueblos y al orden público".<sup>1591</sup>

El Teniente Alguacil Mayor Domingo Lynch, fué quién más sufrió que el depósito de la vara recayera en Maradona, que duró dos años, por cuanto Maradona fué en el primer año enemigo del Alcalde de Primer Voto Juan Ignacio Echegaray,<sup>1592</sup> y en el siguiente año de Andrés Aurelio de Quiroga, y mucho más del Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado,<sup>1593</sup> dado que éste

"...se oponía siempre a sus malas intenciones y torcidos deseos, porque era el único que tenía frente para oponérsele por que a los demás los intimidaba su cavilosidad, intrigas, y arbitrios para siempre dominar con el depósito de una de las varas de Alcalde".<sup>1594</sup>

## **RR-VII Las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.**

Para esa misma época, cuando la crisis comercial y minera alcanzó a las grandes casas monopolistas de Cádiz y a sus consignatarios en las colonias, la hegemonía con que contaban los Regidores propietarios en los Cabildos también entró en crisis, volviendo a prevalecer las pugnas electorales entre clanes familiares opuestos.<sup>1595</sup> En 1799, en Santiago

del Estero, jurisdicción dependiente de la Gobernación-Intendencia de Salta del Tucumán, el que fuera Alcalde Ordinario en 1798, Manuel de Palacio y Amavíscar,<sup>1596</sup> reitera los recelos anti-Salteños que había manifestado con anterioridad su hijastro, el finado José Bravo de Rueda,<sup>1597</sup> expresando "...lo viciosa que es la elección hecha en Don Bartolomé Francisco de Maguna y Pedro de Medina [concuñado del mismo Palacio] para servir los empleos de república de aquella ciudad".<sup>1598</sup>

Un año más tarde, en 1800, el Síndico Procurador Don Baltasar Gaya, que había sido habilitado por el Alcalde José de Yspizúa, revela "...la turbación y entorpecimiento que padecen las elecciones de aquel Cabildo por la maquinación de varios protegidos del Gobernador de Salta, y especialmente por las cavilosas del Regidor perpetuo Don Juan José de Erquicia".<sup>1599</sup> En Mendoza, en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba Coronel José González,<sup>1600</sup> bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas, mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".<sup>1601</sup> Pero el Regidor Propietario Juan de la Cruz Vargas,<sup>1602</sup> temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,<sup>1603</sup> "...teniendo acción cualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",<sup>1604</sup> reclamó a fines del siglo XVIII del Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido efecto su Superior providencia".<sup>1605</sup> Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que "...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".<sup>1606</sup> En lo que hacía al Virreinato del Río de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo, "...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".<sup>1607</sup>

## **RR-VIII La condición de solvencia.**

La consecuencia lógica de las prácticas centralizadoras borbónicas, con las que se beneficiaba a quienes adquirirían venalmente los oficios públicos, fue la persecución de los insolventes. Las Reformas Borbónicas requerían que los aspirantes a capitulares poseyeran solvencia, no estuvieren endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran ausentismos, y tuvieran las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.<sup>1608</sup> En lo que hace a la insolvencia o excesiva pobreza, los pobres podían ser indistintamente los patricios o los peninsulares. Cuando el pobre era un patricio, la ausencia de gastos de viaje aseguraba, a juicio de Burkholder y Chandler (1984), que no aceptaría nunca un puesto oficial por presión de sus acreedores, circunstancia que daría por resultado una administración ejemplar.<sup>1609</sup> Pero cuando el pobre era un peninsular, al no tener parientes ni apoyo familiar alguno, su pobreza lo podía empujar a cometer abusos. Como bien lo consignan Burkholder y Chandler (1984), "...un español acomodado nunca habría abandonado su patria y su familia para exponerse a los peligros de un viaje transatlántico" y ocupar un cargo en un cabildo americano.<sup>1610</sup> Los que sí se exponían a esta aventura llegaban a su destino o bien cargados de deudas, o provistos de mercancía europea consignada que luego negociaban con creces en América. La necesidad de recobrar su solvencia los empujaba a prestarse muchas veces

a transacciones ilegales. Por último, el deseo de enriquecerse era un estímulo más para establecer relaciones ilícitas con familias locales, de manera que los peninsulares establecían rápidamente una mayor dependencia con la región en adopción que muchos de los nacidos en ella.<sup>1611</sup>

De esa forma, los cargos de alcalde de primero y segundo voto, alguacil mayor, fiel ejecutor, procurador general, defensores de pobres y menores, depositarios de Propios y Arbitrios, alcaldes de hermandad o jueces pedáneos y alcaldes de aguas, fueron preferentemente repartidos entre "solventes", peninsulares o patricios, haciéndose casi imposible un control de gestión que beneficiara a la administración del ramo de Propios y Arbitrios, encargada de la venta de dichos oficios. En Oruro, en 1800, el Gobernador-Intendente de Charcas se opuso a que sus Cabildantes,<sup>1612</sup> so pretexto de que el Regidor Decano Manuel Serrano,<sup>1613</sup> se ausentaba reiteradamente del Cabildo a trabajar sus minas, lo removieron de su Veintiquatría.<sup>1614</sup> Aparentemente este último se había ganado la inquina de sus colegas "...por haber escrito una carta en que acusaba a varios de ellos de deudas reales".<sup>1615</sup> Este motivo de venganza, "...unido a la absoluta deliberación en sus elecciones, movieron esta máquina en que sin interpelar, citar, o conminar al interesado, formaron una información mal ponderada".<sup>1616</sup> Pero la privación del voto a un vocal con semejantes excusas viciaba de nulidad la elección,

"...porque la conceptúa el Derecho lleno de estudiada prevención, designios, conventículos, y otros antecedentes relativos a elegir por facciones, mayormente quando la ocupación en trabajar minas, útil a todos estados, no es en Serrano un delito para separarlo con desonor".<sup>1617</sup>

Igualmente en Córdoba, para que José de Ariza,<sup>1618</sup> no obtuviera el cargo capitular que solicitaba, el Cabildo acordaba en agosto de 1777 que

"...deben colocarse en estos empleos, no sólo los más nobles y beneméritos sino es también deben tener la calidad de Ricos [solventes],...,de modo que [aún] cuando se le conceda a José de Ariza, la primera cualidad de Noble, no podrá considerársele idóneo por estar desnudo de las dos subsecuentes [solvencia y arraigo], mayormente habiendo como hay en esta ciudad copia de vecinos veneméritos y de conocidos caudales".<sup>1619</sup>

Cinco años después, con motivo de la solicitud de confirmación de las elecciones capitulares de Córdoba, de 1782, el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,<sup>1620</sup> no ponía objeción a los electos, "adictos al partido de facción que domina esta República [los Allende]", pero por no ser "poderosos [económicamente]" sostiene que están expuestos "a desviarse". A juicio de Guilledo, sólo Don Francisco Antonio Díaz,<sup>1621</sup> y Don Jacinto Díaz de la Fuente,<sup>1622</sup> eran los menos sospechosos "...por las mayores conveniencias que disfrutaban sobre los otros".<sup>1623</sup> Sin duda, el más rico era Díaz, quien entre 1753 y 1780 había contraído en Buenos Aires 54 operaciones de fiado por valor de \$240.868.<sup>1624</sup> En el caso de Díaz de la Fuente estas conveniencias consistían en que ya llevaba concertadas con Buenos Aires entre 1766 y 1774 una docena de operaciones de fiado por valor de \$29.427.<sup>1625</sup>

La razón por la cual se exigía que los candidatos fueran solventes obedecía a diferentes motivos. En principio "...para que libres del aliciente del interés y del temor, puedan servir sus empleos con pureza".<sup>1626</sup> Y en segundo lugar para que puedan "...responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".<sup>1627</sup>

La condición de deudor moroso de la Real Hacienda e incluso de mercaderes ligados a las grandes casas comerciales de Cádiz, o de la Real Hacienda en concepto de azogues, agravaba los motivos de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Pero asimismo, la circunstancia de ser funcionario de Cabildo permitía a los comerciantes que usufructuaban de los privilegios del cargo capitular aprovechar una suerte de fuero o impunidad que influía para que sus demoras en la cancelación de sus deudas fueren esperadas o en algunos casos, renovadas en términos menos gravosos. En Mendoza, en 1796 el Alcalde de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,<sup>1628</sup> como Alcalde de segundo voto era viciosa "...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula se estima oy como Hacienda Real por privilegio".<sup>1629</sup>

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,<sup>1630</sup> la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaria del finado su padre, y no ser de Real Hacienda".<sup>1631</sup>

Asimismo, en La Rioja, en 1801, el Teniente de Oficiales Reales, Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,<sup>1632</sup> tachaba la elección de Francisco Antonio de Soaje y del Signo,<sup>1633</sup> por ser deudor de la Real Hacienda,<sup>1634</sup> y la de Juan Amaranto Ocampo,<sup>1635</sup> por ser contrabandista de tabaco.<sup>1636</sup> La no aceptación de la renegociación de las deudas por los acreedores ocasionaba por lo general la solidaridad de los capitulares del lugar, con la consiguiente repulsa del o de los apoderados de los acreedores foráneos. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas de los azogueros reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma que se daba en el seno de la propia elite Potosina. Ello era así porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros dependía de los sobrepresos que las burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados,<sup>1637</sup> imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.

La condición de fiador venido a menos también agravaba los motivos de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Para fines de siglo, en San Juan, en el recurso de apelación que los Regidores José Ignacio Fernández Maradona,<sup>1638</sup> y José Ortiz Santibáñez,<sup>1639</sup> interpusieron de las elecciones celebradas en 1798, su apoderado Martín José de Segovia alegaba que el Alcalde de primer voto Francisco Borxa Vicentelo de la Rosa,<sup>1640</sup> y el Regidor Fiel Ejecutor Pedro del Carril,<sup>1641</sup> no podían haber votado en las elecciones pues eran deudores de la Real Hacienda; y el Regidor Depositario General Francisco Gregorio Blanco,<sup>1642</sup> tampoco por cuanto

"...por haber contraído tres matrimonios teniendo hijos de todos ellos, y sin haber formado los Capitales correspondientes al tiempo de contraerlos; sino que el Fiador que había dado más era muerto, y sus bienes se adjudicaron a causas y legados píos",<sup>1643</sup>

debería haber renovado sus fianzas. El impedimento de votar en las elecciones capitulares se originaba en este caso en que la ley establecía que no podían ejercer sus empleos

hallándose "...en diferente estado del que tenían cuando entraron a servir sus oficios, o si las fianzas que tuviesen dadas hubiesen venido a menos, o estuvieren de peor condición".<sup>1644</sup>

Como última impresión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso de centralización y formación de un estado patrimonialista se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.<sup>1645</sup> Pero, por el contrario, al ser los oficios venales también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado, al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa; y elitista por el otro, al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra.

## Capítulo I-F-20      **Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes (1739-1810).**

### Índice

- S-I      Confirmación o revocación de elecciones concejiles
- S-II     Mecanismos de defraudación fiscal.
- S-III    Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.
- S-IV    Recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.
- S-V     Recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.
- S-VI    Designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.
- S-VII   Expedición de licencias para vender tabaco y naipes.

### **S-I      Confirmación o revocación de elecciones concejiles**

Ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía la organización del fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación carismática y legal.<sup>1646</sup> Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.<sup>1647</sup> Y a diferencia de los análisis y la narrativa de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de

estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante.<sup>1648</sup>

En el caso de la América Latina colonial, el clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal habría acelerado las condiciones materiales del fenómeno revolucionario. ¿Como operó esta influencia? ¿que tipo de cambios produjeron? Trimberger (1978), una discípula de Theda Skocpol, al referirse a las revoluciones acontecidas en países de capitalismo tardío --como el Japón de la dinastía Meiji, la Turquía de Kemal Ataturk, y el Egipto de Nasser-- adujo que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.<sup>1649</sup> Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.<sup>1650</sup> Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz, en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios españoles.<sup>1651</sup>

Por otro lado, como la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una cuestión sumamente discutible, es muy posible que la defraudación y el cohecho se volvieran una pura necesidad. Para Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendían los corregimientos en el siglo XVIII creció muchísimo, el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo aumentó también en grado sumo, debido justamente a la depreciación del dinero, la baja de su poder adquisitivo, y las constantes usuras a las que estaban sujetos.<sup>1652</sup>

Las políticas centralizadoras Borbónicas se verificaron en la facultad de los Gobernadores de confirmar o revocar las elecciones y decisiones gubernativas y concejiles. Entre estas decisiones estaban las de representar al soberano en actos de honor o etiqueta, las de designar autoridades políticas subalternas, las de recaudar impuestos, administrar bienes de los Expulsos, y las de otorgar licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes. En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los Cabildos en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas anteriores a la centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.<sup>1653</sup> En ese sentido nos preguntamos si los conflictos en el seno de los Cabildos por la recaudación de impuestos, y el libramiento de licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, expendio de tabaco y naipes, y recogida de ganado cimarrón se hallaban o no relacionados con el proceso de centralización del estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites y cabildos locales y a aumentar las presiones fiscales y mercantiles. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

La crónica crisis fiscal y el clima de corrupción que aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario y que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la Plata, se extendió a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, los Propios y Arbitrios, al Situado Real y a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades y la Renta de Correos, fueron durante el prolongado período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.

## **S-II Mecanismos de defraudación fiscal.**

El mecanismo de defraudación más directo y frontal, aunque también el más inusual, por la disuasión que provocaba su eventual castigo, consistía en estafar a la Real Casa de Moneda adulterando la misma moneda y los instrumentos con que se pesaba y acuñaba la plata. Ya en 1652, durante la dominación colonial Habsburga, el ensayador de la Casa de Moneda de Potosí fue hallado culpable de defraudar a la Corona en más de \$472.000, al adulterar con cobre la moneda de plata de ocho reales.<sup>1654</sup> Debido a este descomunal fraude, el Virrey de Lima, Conde de Salvatierra, ordenó en Septiembre de 1652 la observancia de la Real Orden de Octubre de 1650, que estableciera la recogida y fundición de la moneda adulterada y el reacuñamiento de una moneda de 7 1/2 reales por peso. Simultáneamente se declaró en la Real Orden que el viejo peso de ocho reales, llamado moclés, valiera sólo seis reales por peso.<sup>1655</sup> Como dicha fundición se postergaba, un Informe que sobre la recogida de la moneda adulterada emitiera en 1652 la Comisión de Mercaderes de Santiago de Chile advertía que de no hacerse dicha fundición, el primer daño que resultaría sería

"...que los mercaderes que hacen el viaje a Lima irán escogiendo la mejor para llevársela, y la cobriza y de peor calidad dejarán en la tierra, comprando con ella el sebo y el cordobán y otros géneros de este reino...y por la codicia del más valor que se les da no repararán en que sea mala o buena dicha moneda porque no la quieren para atesorarla sino es para darla a este comercio ".<sup>1656</sup>

El otro daño que resultaría de dilatar dicha fundición es que

"...corriendo esta mala moneda de a seis reales los mercaderes alterarán los precios de la ropa, procurando saldar en ella la pérdida que podrán tener en dicha moneda y por consiguiente subirán los mantenimientos,...con que serán siempre los pobres dagnificados".<sup>1657</sup>

Pero el daño más considerable señalado por este notable documento resaltaba

"...que en sabiendo en el Pirú y en Tucumán que se alarga el uso de la mala moneda, meterán en este Reyno [Chile y Tucumán] mucha cantidad y de la de peor calidad por cuanto en la ciudad de los Reyes [Lima] hay muchas personas que han comprado mocleses a 4 reales y a 4 1/2 los más caros, y corriendo en esta ciudad [Santiago] por seis ganan a 50% en dicha moneda trayéndola por empleo, y la emplearán en jéneros deste Reyno por precios muy subidos que aunque en ellas no

tengan ganancias en el Pirú, no les importa respecto de la que han tenido en dicha moneda".<sup>1658</sup>

Tan cierta fue esta advertencia, que en el Río de la Plata, durante el tiempo en que estuvo en vigencia dicha Real Orden, la misma fue la causante de un increíble fraude practicado por el Gobernador de Buenos Aires Jacinto de Laríz. Laríz, según Peña (1911) y Levene (1927), mediante el ocultamiento de la Real Pragmática, fue capaz de aprovecharse de la diferencia entre ambas monedas.<sup>1659</sup> Por último, como los acreedores se negaron a aceptar la nueva moneda --envilecida en medio real por peso-- en pago de sus créditos, el Presidente de la Real Audiencia de La Plata se vio obligado a hacer observar su circulación en forma coercitiva.

Sin embargo, la disuasión que significaba el castigo previsto para quienes adulteraran la moneda no fué lo suficientemente convincente como para que otros funcionarios no intentaran defraudar las Cajas Reales adulterando los dinerales con que se medía la ley que pesaban las barras de plata. Esta posibilidad se acentuaba en momentos de rebeliones indígenas y en localidades apartadas, pues no era fácil encontrar en dichas ocasiones y lugares un vecino español suficientemente calificado en quien pudieran recaer dichos oficios. Es por ello, que en Carangas, durante la rebelión de Túpac Amaru, fue elegido de fundidor, ensayador, y balanzario interino de la Real Caja, Joseph García Manzano, un criollo hijo de españoles, "...suficientemente instruido en el método de ensayar aprendido de su padre que lo ejerció muchos años en la propia Caja".<sup>1660</sup> Pero en 1784, a instancias de las quejas de los mineros por la baja ley que experimentaban sus barras, los Ministros de la Real Hacienda hallaron que Manzano era culpable de utilizar un dineral propio, y no el que se le había entregado cuando se hizo cargo de la fundición.<sup>1661</sup> No podía ser para estos Ministros que se hubieran hallado diferencias de hasta 8 granos en algo más de 20 barras. Asimismo, García Manzano fue acusado de practicar la fundición en su propia casa, y no en la oficina que se hallaba destinada para esa operación.<sup>1662</sup> En su descargo, García Manzano manifestaba no parecerle justo tener que pagar las indemnizaciones pues no gozaba de sueldo alguno, y sólo contaba con los ingresos provenientes de la hechura de las barras, "...que no alcanzan a los gastos precisos de carbón, fábrica de callanas, pago de peones, y demás costas".<sup>1663</sup>

### **S-III Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.**

Con relación a las defraudaciones cometidas en el Alto Perú durante los inicios del proceso de recolonización borbónica en perjuicio de la Compañía de Azogueros, y que provocara la intervención del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, es conocido el caso del Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra.<sup>1664</sup> Este último, que fuera Tesorero de la Compañía de Azogueros, y uno de los tres funcionarios que junto con el Visitador José de Herboso y el Contador Miguel Antonio de Ezcurrechea poseía las llaves del arca, fue acusado en 1752 de sustraer de la misma la suma de \$48.000.<sup>1665</sup> Aparentemente, el Conde entregó a su vez el dinero a la Casa de los Navarro, en perjuicio de Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, el cual poseía la otra Mercancía de Plata existente.<sup>1666</sup> De todas maneras, se sospechaba que el Conde se había quedado con más de la mitad de la remesa. Ambas Casas o Mercancías de Plata, la de los Navarro y la de los Iribarren, continuadora esta última de la de Rodríguez de Guzmán, rescataban las barras de Oro con tardanzas que alcanzaban hasta los cuatro meses, y a precios subvaluados. Tal fue el desastre de estas operaciones, al provocar la quiebra de ambas Mercancías de Plata, que el Visitador General Santelices debió innovar

al respecto, derivando la responsabilidad de rescatar las barras de Oruro a las mismas Cajas Reales de Potosí. Más luego aún, cuando entre 1762 y 1767 gobernaba en Potosí el Corregidor Jaime Saint Just, durante el Virreinato de Manuel de Amat y Junient, Tandeter (1980) nos revela que en la Compañía de Azogueros se alcanzó a dilapidar la increíble suma de \$800.000.<sup>1667</sup>

#### **S-IV La recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.**

Amén de la recaudación del Ramo de Tributos, la administración y el empleo del Ramo de Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios es lo que más desavenencias y conflictos ocasionaba en el mundo colonial.<sup>1668</sup> El derecho de delegar la facultad de recaudar los Propios y Arbitrios y el Ramo de Sisa y Alcabala se registró por vez primera, con abundantes testimonios escritos, en el paradigmático caso Cordobés. En efecto, con motivo de la edificación del Palacio Real de Madrid la corona requirió en 1739 a través de sus Virreyes y Gobernadores una contribución especial en toda América, la cual fue duramente resistida en Córdoba y, en particular, en los valles de Tulumba y Río Seco.<sup>1669</sup> Asimismo, los conflictos arreciaron con motivo de la recaudación de los Propios y Arbitrios y del Ramo de Sisa o de Guerra.<sup>1670</sup> En realidad, el Cabildo debía contar en su Ramo de Propios y Arbitrios con ingentes recursos, producto de los gravámenes a los solares, pulperías, canchas de bolos, y al consumo local de vino y aguardiente, pero cuya recaudación estaba -antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente reorganización de la Real Hacienda-- a merced de la discrecionalidad de los Mayordomos de Propios, encargados del arrendamiento de la recaudación fiscal.<sup>1671</sup> Asimismo, el Cabildo participaba, desde la imposición del Reglamento de 1772, en la administración del Ramo de Sisa, pues este estaba destinado al mantenimiento de la frontera, pagando la soldada a la tropa, constituida por los llamados partidarios o blandengues.<sup>1672</sup>

Pero la verdadera causa de la discordia entre los Cabildantes y la Gobernación de Córdoba emergió cinco años después de haberse impuesto la contribución para la edificación del Palacio Real de Madrid, en 1744, por la desmedida ambición de la oficialidad de las Milicias Urbanas y Rurales en querer participar a prorrata en las Entradas o corambres que oficialmente se practicaban en el desierto. Estas corambres se originaban en la demanda extra generada por los navíos de registro, recalados por vez primera en el puerto de Buenos Aires, luego de la revocación del Real Asiento de Inglaterra (1744). Cuando en febrero de 1744, el Gobernador y Capitán General de Córdoba del Tucumán Juan Alonso Espinosa de los Monteros le mezquinó al Cabildo de Córdoba, integrado por el Alcalde de Primer Voto Maestre de Campo José de Molina Navarrete,<sup>1673</sup> y el Alcalde de segundo voto, el Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,<sup>1674</sup> los ingresos de la Real Sisa, le ordenó librar los arbitrios y medios para la Entrada al Desierto de sus propias cajas, el Cabildo replicó con un Dictamen en el cual se consideraba a dicha orden como "inconveniente", dada la imposibilidad financiera que padecían los vecinos de Córdoba y su ayuntamiento para afrontar la empresa por sí mismos, como había sido de estilo tradicionalmente. Manuel de Estéban y León,<sup>1675</sup> que detentaba la recientemente creada plaza de Teniente de Rey,<sup>1676</sup> contestó el exhorto del Cabildo en un "...estilo preceptivo" que ponía en tela de juicio el Dictamen del Cabildo. En este estado, el Alcalde de Primer Voto Molina Navarrete había librado a fines de 1744 un nuevo parecer y dictamen, apoyado por el Alcalde de segundo voto Arrascaeta, insistiendo en su anterior parecer y dictamen, que consideraba como inconveniente acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. Por consiguiente, no se le ofrecía al Cabildo otro medio que suplicar de nuevo al Gobernador Juan Alonso Espinosa "...destine para el efecto de dicha Entrada [al

desierto] toda aquella parte del ramo de la Real Sisa".<sup>1677</sup> Y si de la benignidad del Gobernador no se podía conseguir este subsidio se aconsejaba al Cabildo recurriese "...por la Secretaría del Cabildo y Regimiento al Excelentísimo Sr. Virrey [del Perú]".<sup>1678</sup> Esta solicitud fue elevada al Gobernador Juan Alonso Espinosa, que residía en Salta, conjuntamente con los Informes solidarios del Cabildo Eclesiástico y de las Ordenes Religiosas

"...para que enterado S.E. de la miseria en que se alla esta pobre Ciudad imposibilitada desta guerra y que únicamente tiene librado su remedio en el Adbitrio insinuado de la Real [Sisa] de la Provincia".<sup>1679</sup>

Este último Ramo de Sisa se recaudaba principalmente en Salta y Jujuy, donde residían los Oficiales Reales y se hallaba la sede central de las Reales Cajas.<sup>1680</sup> Sus ingresos se los destinaba casi en su totalidad a fortalecer la frontera del Chaco salteño.<sup>1681</sup> Al parecer y voto del Alcalde Molina se adhirieron en 1744 el Comandante de Armas Félix de Cabrera,<sup>1682</sup> y los Maestres de Campo Marcos de Ascasubi,<sup>1683</sup> y Juan Agustín de Echenique,<sup>1684</sup> con la sola discrepancia del Alcalde Provincial Manuel Noble Canelas,<sup>1685</sup> quien consideraba necesario acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. De resultas entonces de la negativa del Cabildo a prestar los arbitrios necesarios para hacer la entrada a la frontera sur de Córdoba, el Teniente de Rey Estéban y León ordenó en 1744 la prisión de Molina y de Arrascaeta, medida que estos apelaron ante la Real Audiencia de Charcas.<sup>1686</sup> Es aquí, cuando por vez primera en el siglo, el Cabildo de Córdoba apelaba a la Audiencia de Charcas contra la posición del Gobernador, quien se había negado a prestar los recursos de la Real Sisa, que se recaudaban en Jujuy. No habiéndose producido la Entrada al desierto, las vaquerías quedaron libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña, menudeando todo tipo de tropelías.<sup>1687</sup> Para esa época, año de 1752, el Cabildo de Buenos Aires había establecido por bando gravámenes al cuero y los caldos (vinos y aguardientes), una suerte de Ramo de Guerra, aprobado por el Rey recién en 1779, con los cuales se mantuvieron tres compañías de veteranos, llamados Blandengues,<sup>1688</sup> que debían reprimir a los indios rebeldes.<sup>1689</sup>

Cuatro años más tarde, en 1757, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte, designó al abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco como Comisionado en Córdoba para procesar a los capitulares Gerónimo Luis,<sup>1690</sup> Juan Agustín, y José Gregorio Echenique,<sup>1691</sup> Félix Cabrera, Gregorio Arrascaeta, José Arrascaeta,<sup>1692</sup> Marcos Ascasubi y José Molina Navarrete por el sólo motivo de haber levantado en 1756 cargos de malversación de caudales, que no fueron justificados, contra Estéban y León.<sup>1693</sup> De resultas de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.<sup>1694</sup> Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilleddo,<sup>1695</sup> y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,<sup>1696</sup> Manuel de Castro,<sup>1697</sup> y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilleddo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.<sup>1698</sup> Sin embargo, al persistir el desorden de la campaña o, en palabras de Real de Azúa (1961), al perpetuarse el asedio de la base social, con el ingente número de arrias de mulas que no pagaban la consiguiente sisa y la desbordante gama de corambres ilegales, la imagen de Estéban y León se había revertido a los ojos de muchos vecinos y cabildantes, al extremo de conseguir atraer a su partido "...mucho número del vecindario y aún a los mismos que entonces clamaban a viva voz, pidiendo el desagravio y remedio de las extorsiones que

[Cabrera] les hacía".<sup>1699</sup> Más aún, consiguió atraer a su partido al propio Cabrera "...que hoy es uno de los principales que defienden y fomentan al Teniente de Rey".<sup>1700</sup> De resultas de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde de primer voto a Juan Agustín de Echenique, el mismo que se había opuesto en 1744, conjuntamente con Molina, Ascasubi y Cabrera a la Entrada al Desierto, por cuanto "...se necesita su persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad como su jurisdicción y demás reparos de la causa pública".<sup>1701</sup>

Luego de transcurrido un año, en 1759, con el Cabildo de Córdoba aún controlado por el clan de los Echenique, el Regidor Propietario General Tomás de Allende y Losa,<sup>1702</sup> cuñado ahora del antiguo Alcalde Gregorio Arrascaeta, se opuso a la autoridad del Alcalde Provincial José Martínez Rodríguez,<sup>1703</sup> marido de Clara Echenique y Urtubey,<sup>1704</sup> de resultas de lo cual el Cabildo, lo exhonó de los oficios concejiles.<sup>1705</sup> Finalmente, en 1766, con motivo de las malversaciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>1706</sup> el Virrey del Perú decidió por Auto expedido en Lima que la administración y el empleo del Ramo de Sisa, que tantas desavenencias y conflictos había ocasionado en el vecindario Cordobés, pasase a la responsabilidad de los oficiales reales (Contador y Tesorero) de la Real Hacienda "...con intervención de los cabildos", con total independencia de los Gobernadores del Tucumán, y que las cuentas del correspondiente Ramo se rindiesen ante la Real Audiencia de Charcas.<sup>1707</sup> Pero seis años más tarde, en 1772, un Reglamento fijó que la Administración de la Sisa estuviera a cargo de los Alcaldes y del Síndico Procurador.<sup>1708</sup> Casi veinte años después, en 1791, la impresión que el Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé Don Rafael María Guerrero y Montañez tenía con respecto al cobro de la Sisa en el partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una corrupción generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".<sup>1709</sup> Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".<sup>1710</sup> Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores".<sup>1711</sup> De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".<sup>1712</sup> Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Agustín Garfías,<sup>1713</sup> en representación de la Ciudad de Santa Fé, para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestionó el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan".<sup>1714</sup> Entiende Garfías que no basta con cobrar al vendedor de las mulas y que es preciso gravar en su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfías recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".<sup>1715</sup> Los mismos sinsabores corrían los cobradores del diezmo de cuatropea, lo cual hace pensar que lo que a Halperín Donghi (1992) le hicieron sugerir los cálculos de Garavaglia (1985) estarían muy lejos de la realidad.<sup>1716</sup> Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".<sup>1717</sup> El Juez Hacedor de Diezmos Don José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro, éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hace insufribles detrimentos no sólo a mí, sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante".<sup>1718</sup>

## **S-V La recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.**

No hay duda que el perjuicio se había extendido a otras Tesorerías. Pese a la existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfías quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en subasta pública por \$44.345 la recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala, por el término de cinco años y a razón de \$8.869 cada año.<sup>1719</sup> A ello se sumaba su sociedad con Mayoriano Casco, en calidad de fiador, en la postura del Diezmo.<sup>1720</sup> Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfías se vio precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravamen.<sup>1721</sup> Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo Garfías fue el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfías para detener a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínez, este le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "...hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfías, la acusación se justificaba "...pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".<sup>1722</sup>

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.<sup>1723</sup> En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfías iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfías enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas".<sup>1724</sup> Este argumento fue suficiente para que Garfías se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido".<sup>1725</sup> No obstante, Garfías no se dio por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfías "...el decir que de las mismas tiendas,

sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".<sup>1726</sup>

Asimismo, Garfías debió encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".<sup>1727</sup> Esta excusa parecería haber sido orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfías declara que esta excusa, era "...un entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".<sup>1728</sup> Si bien es verdad que Garfías advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".<sup>1729</sup> La impotencia para auditar a cada vendedor mayorista era reconocida por Garfías al expresar: "...siendo cosa casi inaveriguable el que ayan recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner un sobreestante a cada uno lo cual es imposible".<sup>1730</sup> Garfías se agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta situación crítica Garfías sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".<sup>1731</sup>

## **S-VI La designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.**

A propósito de las reformas fiscales instauradas por los Borbones, que del arrendamiento de la alcabala, por vecinos del lugar, pasó a la administración real asalariada y centralizada, en diversos lugares del interior del Virreinato se fueron reproduciendo múltiples casos de resistencia y hostilidad colectivas contra las autoridades fiscales designadas por la Corona. En el repertorio de acciones colectivas propias de la modernidad absolutista se contaban en el Río de la Plata las serenatas y las cencerradas, con música, canto, burla y pifia de los adversarios.<sup>1732</sup> En oportunidad de la designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala, por lo general foráneos o peninsulares, nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, que desplazaban a los arrendatarios criollos, se presentaba la ocasión para manifestar el disenso contra la opresión colonial, mediante pasquines y décimas anónimas, compuestas de versos tenidos por "insolentes".<sup>1733</sup> En Asunción del Paraguay, los resentimientos contra la dominación porteña se remontaban a la actuación que le cupo al Gobernador Baltasar García Ros, en oportunidad de la Rebelión de los Comuneros contra la Compañía de Jesús (1721-35).<sup>1734</sup> Con el correr del siglo y el aumento de las gabelas (alcabalas) dicho resentimiento se acentuó. En 1776, el Cabildo de Asunción, integrado en su mayoría por encomenderos,<sup>1735</sup> denunció al porteño gobernador Agustín Fernando de Pinedo,<sup>1736</sup> por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.<sup>1737</sup> Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien habría liderado dicho movimiento y quien denunciara su manejo de las reducciones de Indios.<sup>1738</sup> A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción su impopularidad que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador.<sup>1739</sup>

También la venta de coca y su respectivo cobro de la alcabala se hallaba reglamentada. A los extractores de coca se los obligaba a pagar el Real derecho de Alcabala "...de quantas partidas se extraigan cuyo principal no exceda de cincuenta

pesos".<sup>1740</sup> En la ardua tarea de subdividir sus negociaciones en tantas partes como sean necesarias para que cada una no exceda del principal de cincuenta pesos, los productores de coca se ven perjudicados "...pues tiene que pagar por cada una de las guías que les libra el Receptor de Alcabalas los cuatro reales correspondientes, y son tantas [guías] como las divisiones, y se los maltrata si resisten a que se hagan".<sup>1741</sup>

## **S-VII La expedición de licencias para vender tabaco y naipes.**

En cuanto a la expedición de licencias para vender tabaco y naipes, estas las otorgaban las autoridades virreinales a lo largo y ancho de todo el Virreinato. En la jurisdicción del Río de la Plata llegaron a existir 12 administraciones generales, 71 administraciones particulares y 480 tercenas y estancos de tabaco.<sup>1742</sup> En Catamarca, Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires.<sup>1743</sup> En La Rioja, el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes José de Noroña y Losada,<sup>1744</sup> ha hecho

"...por separado comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por los remates de Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma terrena y que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".<sup>1745</sup>

La necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de las justicias locales, hacía que los estancos y tercenas de la Real Renta de Tabaco estuvieren ubicados próximos a las pulperías. En el caso de La Rioja, los Juzgados no podían imponer justicia

"...porqué los [criminales] que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".<sup>1746</sup>

Con respecto a la administración de los bienes de los Expulsos, podemos afirmar que ella perseguía --a través de la designación del Diputado en las Juntas Provinciales de Temporalidades-- la participación primero en el arrendamiento y luego en la subasta de los bienes de los Expulsos. Las luchas por las Diputaciones en las Juntas de Temporalidades, al igual que las luchas por las Maestrías de Postas, reflejaban las contradicciones por la ocupación del aparato civil del estado colonial.<sup>1747</sup> Pero la Expulsión de los Jesuitas significó también una reforma agraria, que generó una creciente distribución del ingreso; así como una reforma laboral, por cuanto dio lugar a la expropiación y redistribución de la numerosa mano de obra esclava existente en manos Jesuíticas. La importancia de las Temporalidades arrancaba entonces de la Expulsión de los Jesuitas, ofreciendo también casos notorios de conflictos inter-institucionales en el mundo colonial español.<sup>1748</sup> Sus autoridades estuvieron originalmente constituidas por los Gobernadores, los Obispos, los Asesores de Gobierno, los Diputados o vocales designados por los Cabildos seculares y eclesiásticos respectivos y los Procuradores Síndicos Generales de Cabildo.<sup>1749</sup>

En suma, podemos ensayar como conclusión, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias a interferir en las decisiones relacionadas con la recaudación de impuestos y la subasta de los bienes de los Expulsos, se acentuó con las Reformas Borbónicas, los integrantes de los Cabildos no cesaron de luchar por su autonomía y soberanía. Es innegable, asimismo, que el cambio de régimen fiscal, de la recaudación por vía de arrendamiento a la recaudación por administración real, acentuó la presión fiscal, y por lo tanto los rasgos colonialistas del gobierno metropolitano. Si bien la administración de la recaudación fiscal por vía de arrendamiento se prestaba a numerosos desfalcos, corruptelas y luchas facciosas, el hecho de estar controlados por los Cabildos evitaba que se engendrara entre las élites criollas y la elite burocrática central una crisis imposible de saldar. Sin embargo, esta inevitable crisis alimentó la animadversión hacia los llamados chapetones y maturrangos que lenta pero irremisiblemente derivó en la revolución de independencia.

## Capítulo I-F-21      **Patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la milicia**

### Índice

- T-I Tradición historiográfica militar colonial
- T-II Métodos de reclutamiento y promoción militar implementados.
- T-III Venalidad de los grados militares.
- T-IV Institución de la llamada asistencia.
- T-V Ascensos militares.
- T-VI Reparto de mercancías en la Milicia.
- T-VII Otros actos de corrupción.
- T-VIII Intensidad de las levas o destinos.
- T-IX Los partidarios y los ordenanzas.
- T-X Sustitutos, escuderos o personeros.
- T-XI Sueldos de la Milicia.

### **Introducción del capítulo I-F-21**

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad militar.

Los conflictos entre la milicia y el estado colonial se originaron por lo general en: a) los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados; b) la intensidad de las prácticas nepóticas; c) la corrupción reinante en la composición de las listas de revista, las dispensas o licencias para ausentarse del servicio, y en la provisión de vituallas y bastimentos; y d) la cuantía y tipo de paga de que eran objeto sus miembros. En las contradicciones entre la Milicia y el Estado colonial, estudiaremos los casos en que el fuero militar afectó la autonomía de los Cabildos de Potosí, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Salta, San Luis, Catamarca y Asunción del Paraguay; y los casos en que la composición étnica de las Milicias influyó en la actitud de los cabildos de Potosí, La Rioja y Salta. Para estudiar todos estos casos, hemos seleccionado una veintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN),

de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Con respecto a los conflictos entre la Milicia y el poder político, su incidencia en la estamentalización y movilidad social estaba directamente vinculada a cuál de las dos jurisdicciones, la civil o la militar, se le otorgaba mayor relevancia, al grado de generalización del fuero militar, a la composición étnica de la oficialidad y tropa, a la disciplina y moral imperante, y a los métodos de reclutamiento implementados.

## **T-I Tradición historiográfica en materia militar colonial**

A juicio de Beezley (1969), Fals Borda (1970-71) y Wiarda (1973), influidos por la lectura de Weber (1922), la administración colonial española, durante la hegemonía Borbónica, devino no solo una estructura estamental y corporativa, heredada de la dominación Habsburga, sino una estructura esencialmente patrimonialista.<sup>1750</sup> Según Halperín Donghi (1982), a fines del siglo XVIII, el Virrey Marqués de Avilés deploraba la frecuencia con que los milicianos llamados a filas se hacían reemplazar con un personero.<sup>1751</sup> Aparentemente fundados asimismo en los juicios de Weber (1922), Kofler (1948,1974) y Anderson (1974) --acerca del estado patrimonial y de la venta de cargos-- Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizan el Perú colonial tardío, sostuvieron que la burocracia colonial habría estado compuesta no solo por funcionarios civiles (regidores y corregidores), sino también por funcionarios militares y eclesiásticos, que participaban de una renta fiscal y mercantil (reparto de mercancías y subasta de bulas), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar el sistema militar colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a este último fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos.<sup>1752</sup>

Sin embargo, para Kuethe (1992), estos funcionarios militares, al serles permitido adquirir con dinero un lugar en la Milicia blanca o española, en realidad lo que se les brindó fueron oportunidades de validar sus pretensiones de ascenso social.<sup>1753</sup> Pero aún luego de la Revolución, el Ejército patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado. Para Runciman (1983), en Europa, y en especial en Francia, los Ejércitos luego de la Revolución no se habrían diferenciado mayormente de los Ejércitos burocráticos Borbónicos.<sup>1754</sup> Y en la América Latina, para Montenegro (1943,1967), Wolf y Hansen (1967), Beezley (1969), Fals Borda (1970-71), Wiarda (1973), Carmagnani y Annino (1981), Andrews (1980,1985), y Brown (1986), el poder de las estructuras político-patrimoniales propias del estado colonial Habsburgo o de los Austrias persistieron aún después de haberse producido las Reformas Borbónicas y la Revolución de Independencia.<sup>1755</sup> Más precisamente, según Real (1957), en tiempos de Rosas el gobierno seguía reclamando el pago de personeros,<sup>1756</sup> como requisito para que aquellos dotados de posibles lograran ser exceptuados del servicio de Milicia.<sup>1757</sup> Más aún, Rodríguez Molas (1982) descubre que a fines de la década de 1880, a pesar de establecerse un riguroso sorteo en el reclutamiento de los ejércitos, se contemplaba la posibilidad de la sustitución mediante personeros.<sup>1758</sup>

Sin embargo, para otra corriente historiográfica, lo que determinaba que las Milicias estuvieran oligárquica o nepóticamente controladas no fue la venta de cargos militares, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.<sup>1759</sup> Mientras la tropa de los ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaba formada por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano, la

oficialidad estaba constituida por un conjunto inflado de posiciones honoríficas. A diferencia de México y Perú, el incesante aluvión de Militares peninsulares que comenzó a radicarse en las provincias del Río de la Plata a partir de la Expedición Demarcatoria de Límites con Portugal (1754), y las Expediciones Militares de Cevallos (1762, 1778), amén de debilitar la naturaleza señorial de los patriciados locales, provocó al decir de Barbier (1972), una oferta ampliada de empleos y ascensos en la organización militar. Este desigual alud inmigratorio hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a las Milicias. Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, el patrimonialismo militar, o subasta pública de cargos militares y venalidad del servicio de Milicias, provocó o no situaciones que con el tiempo profundizaron el resentimiento contra la dominación española.

Por último, un tema bastante postergado en la historiografía colonial americana ha sido el de la naturaleza corporativa de los fueros,<sup>1760</sup> como mecanismos de privilegio y ascenso social, y agentes movilizados de las capas sociales subalternas. Asimismo, fue subestimada la lucha contra la herencia sociológica del poder (nepotismo), del patrimonio (mayorazgo o primogenitura) y del prestigio o alcurnia (Limpieza de sangre).<sup>1761</sup> Autores como García (1900) y Álvarez (1916) insistieron en el nocivo efecto que las corporaciones y los fueros provocaban en la sociedad civil. Rivarola (1934) primero, y McAlister (1959), Archer (1977), Kuethe (1971,1978), Campbell (1978) y Vega Juanino (1986) más recientemente, a diferencia de Domínguez (1985) y de Olaechea (1992), sostuvieron que la existencia de fueros, si bien numerosos en el mundo colonial y post-colonial, al extremo de otorgar privilegios a los pardos y miembros de las castas y atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces, fueron insuficientes para otorgar conciencia de status, y dar nacimiento a una suerte de casta o preeminencia social. Para Rivarola sólo los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. El fuero militar, en cambio, habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos; b) una acentuada movilidad social; y c) privado al mercado de mercancías y mano de obra de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. Levaggi (1971), en tanto, sostuvo que mientras el fuero militar fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Real Hacienda, Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.<sup>1762</sup>

En el caso de las provincias del Río de la Plata se dieron numerosos ejemplos donde el derecho al fuero (militar, eclesiástico, judicial o capitular, universitario y consular), que en el caso militar se manifestaban en las penas y los medios de prueba, contaron como verdaderos privilegios personales que --al liberar a sus miembros de las persecuciones de otras autoridades y atentar contra la integridad de las demás corporaciones-- influían en el comportamiento del mercado de mano de obra afectando causalmente las relaciones de clase e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.<sup>1763</sup> Finalmente, una historiografía revisionista (Góngora,1975; y Flores Galindo,1984), no supo matizar ni diferenciar al sostener que los privilegios y fueros acordados por las Leyes de Indias a la Milicia, al Clero, a los Cabildos, al Gremio de Azogueros y a los Consulados de Comercio fueron tan absolutos que contribuyeron a impedir la circulación de las élites así como a frenar la escasa movilidad social existente, o lo que es su equivalente, a exaltar la estamentalización de la sociedad colonial. Pero para autores como Cabral Texo (1952), Heras (1960), Levaggi (1971) y Cahill (1984), las Reformas alcanzaron, durante la dominación Borbónica, a modificar la preeminencia social provocada por dichos fueros.

Más aún, en períodos de paz, el fuero militar, y con él el militarismo, perdía el carácter activo,<sup>1764</sup> restándole sólo el carácter pasivo, y su implementación era restringida a sólo los momentos de guerra,<sup>1765</sup> al punto que se declaró inaplicable tratándose de hechos que afectasen a la monarquía. No obstante estas restricciones, para Kuethe (1992), el abuso del fuero militar en los juicios celebrados en Cartagena y Panamá dió lugar a la presentación de numerosas quejas contra la amenaza de una subversión peligrosa del orden social.<sup>1766</sup>

Con la Revolución de Independencia la Milicia incrementó sus fueros y su espíritu de casta.<sup>1767</sup> En algunos lugares como Salta se logró mimetizar en lo que se dio en denominar el fuero gaucho.<sup>1768</sup> El impacto del militarismo en la constitución de los órganos representativos fue acaloradamente discutido primero durante la Asamblea del Año XIII,<sup>1769</sup> luego durante el Congreso General Constituyente de 1816,<sup>1770</sup> más luego en la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,<sup>1771</sup> y por último durante el Congreso Nacional de 1826.<sup>1772</sup> Sin embargo, para el rivadaviano congresal Correntino Dr. José Francisco de Acosta,<sup>1773</sup> estas restricciones no fueron suficientes. Acosta era partidario de impedir la admisión a las Cámaras de Representantes de aquellas personas que gozaren de fueros particulares, pues mientras "...los ciudadanos del fuero común son aquellos de cuya causa en ninguna cosa está el juez común inhibido de entender de ella", los militares y los curas tienen en las causas que la ley les ha expresado "...sus jueces privativos y particulares [o propios] con inhibición de todo otro juez que lo pueda juzgar".<sup>1774</sup>

## **T-II Los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados.**

Los titulares de grados militares venales, eran conocidos en la época colonial como oficiales de beneficio.<sup>1775</sup> Los grados de cabo y sargento, por ejemplo, se vendían por cortas sumas de dinero, según el tiempo de su duración. En Tarija, algunos regidores habían expuesto en el Cabildo abierto de 1778 que el Coronel de Milicias Luis Hurtado de Mendoza,<sup>1776</sup> había otorgado ciertas promociones militares "...por algún interés, con que le han servido sus pretendientes".<sup>1777</sup> Pero en aquellas ciudades alejadas de los circuitos mercantiles o en períodos de depresión comercial donde y cuando los patriciados respectivas, por carecer de medios para adquirir dichos cargos, recurrían a los Propios y Arbitrios para financiar las Milicias, eran los mismos Cabildos los que se encargaban de formar las compañías y de otorgar los grados militares, en acuerdo y confirmación con los Gobernadores y los Comandantes de Armas. Si bien en Buenos Aires, Cabodi (1950) recuerda que la plana mayor de las Milicias de los partidos se reclutaba siempre entre los hacendados más pudientes,<sup>1778</sup> en Corrientes, probablemente debido a la anarquía generada por las secuelas de las Guerras Guaraníticas (1754-56), el reclutamiento, promoción y baja de los milicianos se organizaba en medio de un desorden sin igual por cuanto el pase a retiro efectivo de la oficialidad se daba con una frecuencia inusitada y era regido por motivaciones puramente extra-militares. En dicha ciudad de Corrientes, Melchor de Rojas y Aranda,<sup>1779</sup> consideraba en 1758,

"...cosa de risa ver unos oficiales que no saben lo que es ser soldado, tan presto se nombra un oficial como se quita, sin atender a más méritos, que a la voluntad del que los nombra, que apenas avrá uno que pase de 25 años [de edad]".<sup>1780</sup>

De esta forma los vecinos Milicianos se veían obligados a obedecer "...a quienes los miran con tanto desprecio, y tan poco amor, sin atreverse a representarlo, porque luego los tratan

de motineros, que es su común vocablo".<sup>1781</sup> Sebastián de Casajús relataba cómo en Corrientes cuando en un día domingo

"...que entra la compañía a su turno nombran a algunos o los más de ellos y al siguiente domingo que salen los reforman [jubilan] y nombran otros tal y tan bueno; sin más averiguación de sus méritos o pericia militar, mas que porqué aquél dio al ayudante un caballo, el otro al Sargento Mayor un buey".<sup>1782</sup>

De este modo, Casajús expresaba "...se ha buuelto toda la baraja reyes y casi toda la gente son reformados y graduados, con esta francachela o bendimia que hacen de los sitados empleos".<sup>1783</sup> Como consecuencia de esta "francachela" ninguna persona medianamente distinguida quería emplearse en dichos oficios. De este modo, qué instrucción, qué doctrina ni disciplina, se preguntaba Casajús, "...¿puede aver en la jente joven?".<sup>1784</sup> Tan era así, que cuando en 1764 ocurrió en Corrientes –a imitación del Paraguay– el levantamiento conocido como de los Comuneros, Casajús lo atribuyó al hecho de haber estado el Gobierno político y militar "...en manos de la plebe".<sup>1785</sup> Como consecuencia de ello, habiendo venido en ese entonces a Corrientes el Gobernador Bruno Mauricio de Zavala "...estableció unas ordenanzas o reglas para el buen régimen de las Milicias,...las hizo intimar al Cabildo, el cual en nombre de la ciudad las obedeció".<sup>1786</sup> También en Salta se daba una rotación desmesurada de los cargos militares. Hubo en ella un sólo Comandante Oficial Veterano, "...que confirmado por el Soberano, permaneció de tal, hasta que falleció".<sup>1787</sup> Todos los demás Comandantes "...han sido unos hombres particulares, y algunos oficiales de Milicias, que como beneficiados por el Gefé, han sido por este quitados y puestos otros a su voluntad, sin que quedasen con el menor destino".<sup>1788</sup> Como esto era común y ordinario, los Comandantes que cesaban en sus cargos no sentían por su relevo "...el menor desdoro, y se retiraban a sus destinos particulares".<sup>1789</sup> El desorden fué tan intenso que hasta los derechos parroquiales eran cobrados compulsivamente por las Milicias. En Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir en 1784 que las Milicias Provinciales colaboraran en el cobro compulsivo de los derechos eclesiásticos.<sup>1790</sup>

### **T-III La venalidad de los grados militares.**

Los grados militares intermedios, como el de Coronel o Capitán de Milicias, que era propio de aquellas ciudades que por su ubicación geográfica se hallaban articuladas al comercio de larga distancia entre los enclaves y polos mineros y mercantiles (Potosí-Buenos Aires), se vendían al costo de uniformar una compañía, compuesta por lo general de algo más de cuarenta plazas.<sup>1791</sup> En el Alto Perú, Luis Hurtado de Mendoza había comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de Milicias en \$500.<sup>1792</sup> En Salta, en 1785, a juzgar por un escrito del Dr. Francisco Ángel Astete, en defensa de sus patrocinados los comerciantes porteños Francisco Medina y Manuel de Arana y Torrezuri, lo que asombraba del deudor Tomás Villota,<sup>1793</sup> Capitán de Milicias de Salta, pero residente en Buenos Aires, era que su grado militar careciese de "...título, compañía, regimiento ni domicilio conocido", y que más aún ocurriese ante la superioridad "...para su confirmación".<sup>1794</sup>

Los precios de las jerarquías de Ejército eran muchísimo más altos que los de las jerarquías de Milicias y se adquirían en la corte de Madrid. El grado de Brigadier de los Reales Ejércitos, existente sólo en las capitales de Virreinato, se vendía a razón de \$10.000, habiéndolo adquirido en Lima entre otros el Secretario del Conde de Superunda, Virrey del

Perú, Don Diego de Hesles Campero,<sup>1795</sup> y el dueño de ingenios de moler metal del Potosí José de Montes García.<sup>1796</sup> En Buenos Aires, entre los Oficiales de Ejército figuraban personajes poderosos, tales como regidores perpetuos, fundadores de capellanías, comerciantes y hacendados. El Coronel José Antonio de Otálora y el General Antonio de Larrazábal fueron fundadores de dos importantes capellanías.<sup>1797</sup> Mucho después de producida la Revolución, el régimen de venta de oficios de milicia continuó. De otra manera no se explica como Félix de Álzaga,<sup>1798</sup> alcanzó en tiempos de Rosas el generalato.

Por lo general, la lucha contra el patrimonialismo en el seno de la Milicia se manifestaba en aquellos conflictos donde se encontraban involucrados los Gobernadores, los Comandantes de Armas y los Cabildos, y en los reiterados intentos de incorporar fuerzas militares veteranas en el seno de las fuerzas disciplinadas indianas. En Asunción del Paraguay, en tiempos del Gobernador Pedro Melo de Portugal, con motivo de las contiendas que se dieron por el empleo de Maestre de Campo entre Salvador Cabañas y Ampuero,<sup>1799</sup> José Espínola y Peña,<sup>1800</sup> y José Antonio Yegros,<sup>1801</sup> el Rey resolvió en tiempos de Vértiz se mandara a Melo de Portugal "...redujera la milicia de la provincia a tres regimientos, de cada uno de los cuales debía ser Coronel uno de los sujetos nombrados".<sup>1802</sup> A pesar de la intervención del monarca, los problemas políticos en el Cabildo de Asunción por los ascensos militares subsistieron, pues el Gobernador-Intendente Joaquín Alós y Brú,<sup>1803</sup> conceptuaba en 1787 que para producir ascensos militares se daban múltiples inconvenientes. El primero consistía en que

"...componiéndose todos los [miembros] de este Cabildo de oficiales milicianos los mas de Tenientes y Subtenientes que anualmente se mudan, no puede haber el debido arreglo en las Propuestas porque siempre proporcionarán las cosas de tal suerte que ellos vaian ascendiendo a los de sus casas y Parcialidades".<sup>1804</sup>

#### **T-IV La institución de la llamada asistencia.**

La base material del patrimonialismo militar consistió en la institución de la llamada asistencia u obligación de asistir, semejante a la capellanía. Esta institución dotaba a los hijos o herederos de los instituyentes de una renta con que poder sentar plaza de cadete en regimientos o compañías. Los hijos de oficiales con grado de capitán o superior podían ingresar como cadetes sin necesitar probar renta alguna, pero los que no tenían ese origen debían gozar de una renta de por lo menos cuatro reales diarios.<sup>1805</sup> En Buenos Aires, para poder disponer los jefes de las Compañías de Blandengues de la Frontera la admisión de un cadete debían estos presentar los documentos de asistencias correspondientes. María Isabel de la Palma y Gaete, viuda de José Manuel de Azpiázu y Urrutia, miembro de una familia de curas y beatas,<sup>1806</sup> obligó a asistir en 1799 a su hijo Fulgencio Azpiázu con \$10 cada mes, equivalente a una renta anual de \$120,<sup>1807</sup> para "...poder continuar su mérito en clase de cadete en las compañías de blandengues de las fronteras en las que a servido antes de soldado distinguido".<sup>1808</sup> De resultas de este sistema, cuya generalización ignoro, la milicia de Buenos Aires habría quedado en manos del patriciado, produciéndose en su seno un alto índice de parentescos. Las asistencias, al igual que las capellanías en la Iglesia, no eran un acto de liberalidad sino una imperiosa necesidad si se deseaba que sus hijos o yernos hicieran la carrera de las armas.

#### **T-V Los ascensos militares.**

Para lograr ascensos en grados militares más altos, como el de Coronel o General de Ejército, fue preciso, luego de la erección del Virreinato del Río de la Plata, lidiar con la más alta burocracia en la corte real misma. Por ejemplo, el azoguero Pedro Antonio Azcárate solicitó con éxito en 1804, merced a suculentos donativos, el grado de Coronel de Ejército.<sup>1809</sup> Asimismo, Santiago Alexo de Allende Mendiola,<sup>1810</sup> se creía acreedor, como lo habían sido sus tíos carnales Tomás y José de Allende y Losa, al grado de General, para cuya gestión había invertido ingentes sumas de dinero, e incluso intentado viajar a España en 1786, motivo por el cual sus primos hermanos, los Allende Ascasubi, le entraron a reclamar la rendición de cuentas de la compañía de mulas que sus mutuos padres habían concertado en el pasado.<sup>1811</sup> Santiago Alexo de Allende se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo.<sup>1812</sup> Finalmente, la corona no le concede el grado solicitado.<sup>1813</sup> Veinte años después, en septiembre de 1807, luego de la experiencia invasora inglesa, los alcaldes Ambrosio Funes y Francisco Antonio González se vieron precisados a dirigirse al Virrey Liniers, para expresarle que en la organización de un nuevo regimiento

"...la experiencia ha dado a conocer la incapacidad y la sevicia de su Gefe [Allende] en las últimas expediciones: de modo que sus terrores, y la ojeriza que se ha grangeado por tantos títulos imposibilita su reunión, aun que se ha trascendido, que el Gefe atribuye la causa a nuestros influjos o a los de este Cabildo",<sup>1814</sup>

Allende replicaba al Cabildo de Córdoba como si los informes acerca de las Expediciones militares, "...comprensivas de incalculables desastres, ya en detrimento de tantos infelices, ya de esta jurisdicción, ya de la agricultura, del comercio, y del herario",<sup>1815</sup> no fuesen unos documentos "...más irresistibles, que sus pribadas falsificaciones autorizadas (cual es regular) con los cómplices de sus excesos".<sup>1816</sup> Entre sus excesos

"...no ha sido el menor conducir los pocos soldados que pudo recojer de su Cuerpo con el intento de oponerlos al diestro enemigo británico, destituidos de táctica, sin caballos de disciplina, sin armas aparentes, y sin aptitud para tamañas empresas".<sup>1817</sup>

## **T-VI El reparto de mercancías en la Milicia.**

En cuanto al llamado reparto de mercancías, formalmente abolido en 1782 pero subsistente en la práctica, la gran mayoría de los Comandantes de Armas y sus planas mayores participaban de los mismos, así como del comercio fronterizo con los indios.<sup>1818</sup> Las partidas de mercancías importadas eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios,<sup>1819</sup> y a la tropa en los fortines y plazas de armas. En el Paraguay, en 1797, el Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago, correspondiente a las antiguas Misiones, con la oposición del Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,<sup>1820</sup> licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba [con el objeto de]...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita".<sup>1821</sup>

El reparto de mercancías en la Milicia, o pago en especie, se hallaba generalizado en todo el espacio colonial. En Corrientes, Gelman (1985) halló este fenómeno vigente en sus Milicias. En Buenos Aires, la crónica exigencia a las Cajas Reales de Potosí, de enviar el Situado cuanto antes, obedecía a la necesidad de cancelar con moneda fuerte (doble) la deuda contraída por la tropa del Presidio con los comerciantes de la plaza.<sup>1822</sup> El Corregidor y Visitador General de Potosí Ventura de Santelices y Venero,<sup>1823</sup> bajo cuya responsabilidad se encontraban en ese entonces las Cajas Reales,<sup>1824</sup> no comprendía o no quería comprender que para poder cancelar a los comerciantes los adelantos fiados a la tropa durante el año el Presidio de Buenos Aires esperaba sólo moneda doble,<sup>1825</sup> y rechazaba la moneda sencilla.<sup>1826</sup> En carta dirigida el 17 de julio de 1754 por Juan Francisco Uzal S.J., Procurador del Presidio de Buenos Aires en Potosí a su superior el Veedor General del Presidio de Buenos Aires Nicolás de la Quintana y Echeverría, le explicaba que Santelices no entendía "...que la plata que va para el Presidio llega allá cuando ya la tienen gastada los soldados, supliéndosela los [comerciantes] que esperan compensación en la doble, cuando llegue".<sup>1827</sup> De no ser de esta manera, "...no hallaría el soldado quien le socorriese su necesidad".<sup>1828</sup> En Salta, Julián Gregorio de Zegada,<sup>1829</sup> sostenía que los sueldos de los milicianos denominados partidarios,<sup>1830</sup> a diferencia de los llamados ordenanzas,<sup>1831</sup> se demoraban tanto en llegar que los milicianos al no tener

"...con que aperse de cabalgaduras, y demás cosas que deben tener para el desempeño de su ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian recibiendo al fiado en ocho lo que no vale dos por la poca esperanza, que tiene el que las fía de recoger su dinero".<sup>1832</sup>

Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les obliga a recibir cuatro pesos en géneros si quieren ver uno en dinero".<sup>1833</sup>

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la región.<sup>1834</sup> De resultados de esta situación, Zegada sostenía que en 1802 muchos recelaban de sentar plaza, al extremo de que el Comandante de la Frontera del Río Negro Carlos Sevilla,<sup>1835</sup> al presentar los pagos de sus cuarenta plazas,

"...no tenía en realidad sino quince recibiendo el dinero que correspondía a las demás y haciendo división de él entre no sé quienes".<sup>1836</sup>

## **T-VII Otros actos de corrupción.**

La lucha contra el patrimonialismo en la Milicia no alcanzaba sólo a los llamados repartos de mercancías sino que se extendía a actos de corrupción de la gama más variada. A juzgar por un escrito recientemente hallado,<sup>1837</sup> elevado al Virrey Joaquín del Pino por un numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por la creciente escasez de mano de obra provocada por el reclutamiento de milicianos para el fuerte de Orán, en la Milicia de Salta se daban en 1802 repetidos casos de corrupción. Las Comandancias de Diego José de Pueyrredón,<sup>1838</sup> en el Fuerte de Ledesma, y la de Juan José Cornejo,<sup>1839</sup> en el Fuerte de San Fernando del Río del Valle, lejos de convenir al vecindario de la Frontera, eran a juzgar por el documento citado, "...necesario y conducente su exclusión".<sup>1840</sup> Pueyrredón no habría sido diez años atrás "...ni soldado Miliciano, ni después ha hecho proeza alguna".<sup>1841</sup> Este era "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma",

donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".<sup>1842</sup> A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,<sup>1843</sup> proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su comando".<sup>1844</sup> La presencia de estos indios, era para los firmantes del escrito, perjudicial para la frontera, "...por los conocimientos y vaquía, que adquieren para las invasiones y alianzas que hacen con este motivo con los [indios] reducidos".<sup>1845</sup> Dicha provisión de mano de obra indígena le valía a Pueyrredón "...más que el salario de 600 peones anuales, y las excesivas raciones que tiene de carne, vizcocho, tabaco, y yerba".<sup>1846</sup> Tenía además Pueyrredón "...la vergonzosa grangería del vizcocho para racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior calidad, él lo da como Abastecedor, de inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce reales abonándose el Ramo a 18 reales".<sup>1847</sup> Asimismo, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".<sup>1848</sup>

En cuanto al Comandante Cornejo, era para la misma época dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. [José] Medeyros".<sup>1849</sup>

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,<sup>1850</sup> mujer del Tesorero Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero,<sup>1851</sup> recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".<sup>1852</sup> Con el servicio de los soldados, Presidarios e Indios infieles, Cornejo hacía "...mucho grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".<sup>1853</sup> Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de los enemigos, hace por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones de que es Abastecedor con su hermano Don Antonino".<sup>1854</sup> Si bien la revista mensual de los Fuertes del Río del Valle era practicada por un Comisionado o Subdelegado de Revista, como éste era "...amigo y pariente de Cornejo, jamás se llegará a notar la menor falta de soldados, que tiene fuera del real servicio, y en el [servicio] de su suegro Dr. Medeyros".<sup>1855</sup> A más de los soldados fijos, que usurpaba Medeyros, como no se los permitía el Reglamento de Sisa, "...no parecen como ordenanzas, sino como Partidarios, y puestos en lista de los Fuertes".<sup>1856</sup>

También en San Luis se registraron casos de conflicto entre la Milicia y el vecindario, los que desembocaron en un desorden y corrupción más graves aún que los registrados en Salta. El Comandante de Armas y Juez Veedor del Mineral de La Carolina Don Luis Lafinur,<sup>1857</sup> no se limitaba sólo a una concepción material del patrimonialismo sino que se extendía hasta comprender una concepción sexual del mismo, es decir incluía una suerte de derecho de pernada. En esta última localidad, Doña Ubalda Sosa,<sup>1858</sup> debió denunciar en 1796 a Lafinur por las "...malignas intenciones que ha tenido contra mi honor".<sup>1859</sup> Dicha denuncia debió hacerla ante el Virrey Pedro Melo de Portugal, por cuanto el Gobernador-Intendente de Córdoba era

"...echura del Comandante e imponderado favorito suyo,...pues este [Lafinur] tiene en el Gobierno el favorable resorte de ser compañero del Dr. Victorino Rodríguez, balido del Sr. Gobernador y su Director privado".<sup>1860</sup>

Dos años después, el marido de Ubalda Sosa, Don Agustín Fiadas, objeto de la venganza de Lafinur, tuvo que emprenderla con el Alcalde Provincial Sebastián Ramírez de Villalón, también hechura del Comandante Lafinur, pues ya antes de rematar la vara de Alcalde Provincial

"...estilaba por la campaña la escandalosa acción de tomar por violencia y exprimirles por sus propias manos los pechos a las mugeres solteras para conjeturar por ese reprobado medio si habían tenido acceso carnal a varón y depositarlas [en sagrado]".<sup>1861</sup>

Con estos recursos Villalón "...se hizo temible por la campaña adoptándose el renombre de Lechero".<sup>1862</sup>

### **T-VIII La intensidad de las levass o destinos.**

La incidencia de la lucha contra las presiones patrimonialistas en el seno de la Milicia variaba con la intensidad de las levass, movilizaciones o destinos y los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados. Con respecto a las levass, estas generaban conflictos institucionales según quien las administrara. En Córdoba, el anteriormente citado líder de la facción Sobremontista,<sup>1863</sup> Coronel Santiago Alexo de Allende, sufrió en 1806, con motivo de las Invasiones Inglesas, un fuerte desgaste político no sólo por su triste papel en los hechos que derivaron en la caída de Montevideo, sino también debido al juicio que le siguieron varios cabildantes y comerciantes de Córdoba, pertenecientes a la facción funesista,<sup>1864</sup> por los atropellos, daños y quebrantos cometidos cuando se alistó o destinó a la gente que partió a la defensa y reconquista de Buenos Aires.<sup>1865</sup> El Cabildo de Córdoba demandó a su gobernador, llevándolo hasta las instancias de la Real Audiencia de Buenos Aires. Para Ambrosio Funes,<sup>1866</sup> Francisco Antonio González,<sup>1867</sup> Francisco de Recalde,<sup>1868</sup> Fermín de la Sierra Pico, Lorenzo Antonio Maza, José Antonio Ortiz del Valle,<sup>1869</sup> José Yofre,<sup>1870</sup> Juan del Prado y Estéban Bouquet y Arias,<sup>1871</sup> en un oficio dirigido al Presidente, Regente y Oidores de la Real Audiencia de Buenos Aires, en marzo de 1807, interiorizarse de los acontecimientos de la Expedición encomendada al Coronel Allende, revestido entonces del grado de Mayor General,

"...sería dar la historia del despotismo, y de las desolaciones, [pues] toda esta ciudad, su dilatada jurisdicción, los millares de hombres que militaron a sus órdenes, y hasta esa misma capital, son otros tantos testigos de su altiva conducta, y de los excesos a que lo precipitó".<sup>1872</sup>

Autorizado el reclutamiento forzoso o leva de la expedición para la reconquista de Buenos Aires por bando en la ciudad de Córdoba, y por circulares en la Campaña, en él se ordenó se presentasen en 24 horas todos los estantes y habitantes entre 20 y 50 años de edad. Si el Coronel Allende redujo la Ciudad de Córdoba a una gran consternación, a la campaña la puso en el mayor conflicto, pues era "...la estación en que las vestias ya desfallecían por los fríos, y en que empezaban las sementeras de trigo".<sup>1873</sup> Pero si la leva o reclutamiento forzoso que practicó fue funesto, no lo fue menos su retorno a Córdoba luego de su Expedición a Montevideo, pues

"...a pesar de la estrecha armonía en que estaba con el Comandante Coronel Don Francisco Rodrigo,<sup>1874</sup> intenta despojarlo del mando militar: y sin esperar a que termine la competencia a los dos días de su arribo se apoderó de la sala de armas".<sup>1875</sup>

Ocurrida la Revolución de Mayo, esta lo encontró al Coronel Allende en las filas de la contra-revolución, y como uno de los jefes de la misma, fue condenado a muerte. Como una de las consecuencias de su ajusticiamiento, su sobrino segundo Tomás Bailón Allende,<sup>1876</sup> fue promovido en la carrera militar advirtiéndose en su despacho que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".<sup>1877</sup> Por último, el despacho justifica el proceder de la Junta refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel tío de V. S., sino el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su patria, empeñó todos sus esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la división de los pueblos, su anarquía y su ruina".<sup>1878</sup>

## **T-IX                    Los partidarios y los ordenanzas.**

En las ciudades o villas próximas a las rutas comerciales y que contaban con un alto grado de penetración comercial, como Córdoba, Tucumán o Salta, la Milicia pudo contratarse venalmente. La misma estaba constituida en Córdoba y Salta por los llamados partidarios, pagados con partidas presupuestarias específicas, como el Ramo de Sisa, la Bula de la Santa Cruzada, o la Limosna de la Redención de Cautivos; y en Buenos Aires por los llamados blandengues, pagados por el Ramo de Guerra.<sup>1879</sup> Cuando como en el caso de Córdoba, ocurrido en 1753, se suspendió la cobranza del Impuesto de Sisa de la Yerba y el Tabaco, que por allí transitaba, de Buenos Aires al Reino de Chile, la Real Audiencia de Charcas se vio precisada a reformar (pasar a la reserva) los 50 Partidarios que defendían la frontera del Paraje del Río Cuarto del asalto de los Indios infieles, por no haber fondos para su subsistencia. Ello obedeció también a que la Sisa de Mulas se consumía en mantener exclusivamente los Partidarios de las Fronteras de Jujuy y Salta.<sup>1880</sup> Finalmente, la Real Audiencia propuso para la defensa de estas fronteras, "...el adbitrio de la Santa Bula que contribuyen las siete ciudades de aquella Provincia".<sup>1881</sup> O como en el caso de Salta, ocurrido cuarenta años más tarde, en 1792, en que el Gobernador Ramón García de León y Pizarro, so pretexto de un alcance o desfalco sufrido por el Ramo de Sisa, amenazó con suprimir el resguardo de la Frontera, pensionando a las Milicias de la Provincia para guarnecer los Presidios de ella, el Cabildo de Salta se opuso a ello enviando a Buenos Aires al Regidor Mateo de Saravia y Jáuregui para que recurriera al Virrey.<sup>1882</sup>

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que no contaban con un alto grado de penetración comercial, como La Rioja, Catamarca o Santiago del Estero, la Milicia la constituían los llamados ordenanzas y no contaba con partidas presupuestarias que le permitieran contratar oficialidad y tropa mediante una paga. Sus Cabildos debieron financiarla, exclusivamente con los recursos provenientes de Propios y Arbitrios, y sus integrantes debieron reclutarse necesariamente de entre sus propios vecindarios.

## **T-X     Sustitutos, escuderos o personeros.**

La dispensa para impedir ser destinado, a la Milicia o para ausentarse de dicho servicio, se otorgaba solo mediante "composición" o adquisición venal, es decir poniendo sustitutos, escuderos o personeros.<sup>1883</sup> En los casos de los ya destinados, la dispensa era sustituida por el pase de la Milicia rural a las Milicias Urbanas.<sup>1884</sup> En Tarija, en 1790, cuando el Comandante Juan Manuel de Molina ordenó a los vecinos aprontarse para la Entrada a los Pueblos de Indios Infieles de Chimeo y Zapatera, estableció que "...el que no pudiese marchar abiasse [o abilitase] algún soldado".<sup>1885</sup> Sin embargo, Melchor García de Villegas manifestaba "...que no era conveniente a la primera corrida entablar a los soldados en que los abiasen otros, pues a este ejemplo en lo sucesivo ninguno o los mas no querrían caminar sin igual auxilio".<sup>1886</sup> En Mendoza, habiendo sucedido en el mes de Marzo de 1779, un alboroto de indios para cuyo sosiego se hizo Expedición se le admitió a Domingo Corvalán "...personero equipado con armas y caballos, y estipendiado a costa de mi parte".<sup>1887</sup> En Paraguay, Garavaglia (1984, 1987) constata la existencia de escuderos y de un fondo de guerra para financiar las expediciones a la frontera.<sup>1888</sup> En la Banda Oriental, Mariluz Urquijo (1987) también constata el uso generalizado que se hacía de dicha institución feudal.<sup>1889</sup> Y en Buenos Aires, Mayo (1987, 1992) comprueba como las Milicias Urbanas operaban como una institución donde se refugiaba la nobleza pastora o elite de la campaña, ansiosa por eludir el servicio de frontera.<sup>1890</sup> En la mayor parte de los casos, he podido comprobar que el régimen de sustitutos o personeros se hallaba bastante extendido.<sup>1891</sup> Cuando en 1762, con motivo de la reconquista de la Colonia del Sacramento, se habían convocado en la provincia de Buenos Aires dos compañías por cada pago o distrito, el pago de los Arroyos revistó en la primer compañía 43 soldados de los cuales 17 fueron personeros, y en la segunda compañía 46 soldados de los cuales 8 resultaron ser también personeros.<sup>1892</sup> Con motivo de la toma de la Colonia del Sacramento, Ignacio Rezábal declaraba en una querrela por calumnias sustanciada en 1808 que en aquella oportunidad "...fuí relevado de hir en persona lo mismo que otros de su clase es decir por ser caxero de una casa de comercio de grueso giro, pero tuve que poner personero a costa de mi dinero, y a satisfacción del expresado Comandante".<sup>1893</sup> Esta franquicia la obtuvo Rezábal

"...con la indispensable calidad de hacer aquí el servicio de Plaza, de modo que a un tiempo desempeñábamos dos servicios, en campaña con personero, y en nuestro domicilio cada uno, con su individuo o con Personero, y a falta de este, no pocas veces teníamos que montar guardias, y hacer Patrullas personalmente".<sup>1894</sup>

Más luego, en oportunidad de la primera Guerra de Coalición contra la Francia Revolucionaria, en 1795, Rezábal declaró que estando en Potosí, amenazados por el rumor de una flota Francesa en los Mares del Sur, las Milicias Urbanas debían servir

"...sin prest dentro de la ciudad, y al soldado que por sus ocupaciones mercantiles, o por las de su empleo, arte, y oficios con que se mantenía le hera gravoso, hacer la fatiga por sí, que ordinariamente consistía en dos guardias y una patrulla al mes, se le admitía personero a quien se le pagaban a seis reales las guardias y a quatro las patrullas".<sup>1895</sup>

Asimismo, en las ciudades, como Buenos Aires, cada cuatro comerciantes estaban obligados en 1797 a proporcionar un personero.<sup>1896</sup> Y en oportunidad de las Invasiones Inglesas, en Córdoba, se vio, que el Coronel Santiago Alexo de Allende

"...daba por exentos a una multitud de individuos aptos para la guerra; por que contribuían con forniture, con caballos, o con otros arbitrios, que ahorran los dineros, [y esto con] la acrimonia, las exasperaciones, los insultos particulares, al hacer la asignación de los que alistaba para dicha empresa".<sup>1897</sup>

Cuarenta años más tarde, y a pesar de haber transcurrido más de tres décadas desde que ocurriera la Revolución de Mayo, los gobiernos seguían practicando la leva y reclamando a los que se exceptuaban del servicio el pago de personeros. Estando Juan Sáenz Valiente, negro criollo de 24 años, y Juan María Gutiérrez presos en Santos Lugares, para lograr ser liberados el primero puso un personero y la madre del segundo puso diez personeros.<sup>1898</sup>

## **T-XI Los sueldos de la Milicia.**

Los sueldos de la Milicia, variaban según la jerarquía, el estado de paz o guerra, y la localización geográfica. La paga mensual por soldado oscilaba entre 8 y 11 pesos, según el lugar y el estado de paz o guerra. En el Paraguay, los salarios eran pagados a los Milicianos sólo durante tiempos de guerra a razón de ocho pesos plata por mes.<sup>1899</sup> En el Alto Perú, a los Coroneles que se emplearon en la represión de la rebelión de Túpac Katari se les asignaron mensualmente \$120 y a los Tenientes Coroneles \$80.<sup>1900</sup> En Santa Fé, cada blandengue hacía la fatiga en 1797 con cinco caballos propios y el sueldo de \$11 cada mes sin ración alguna.<sup>1901</sup> Posteriormente, en el Destacamento del Fortín del Saladillo, de la misma provincia, cobraban mensualmente un capitán \$25, un alférez \$9, un sargento \$12, un cabo \$10 y cada soldado \$9, más la ración de carne.<sup>1902</sup> En La Carlota, provincia de Córdoba, para el mismo año de 1797, el Comandante cobraba anualmente \$600, el Capellán \$200, el Sargento Mayor \$144, y cada soldado \$96 pesos plata.<sup>1903</sup> La paga de estos sueldos se demoraba de tal forma que a los efectos de su cobro los soldados y oficiales solían librar poderes especiales a los comerciantes que les fiaban las vituallas con que se sustentaban. El soldado blandengue en la Frontera del Zanjón José Gómez libra en 1776 un poder a favor de Domingo Estévez.<sup>1904</sup> El soldado Gregorio Tello, quien prestara servicios en la Compañía del Capitán Pablo Hereñú, en el Río Grande de San Pedro, y los soldados José Pereira, José Pelayo Benítez y Pablo Colman, de la Compañía de Milicias en la Expedición del Río Grande, libraron sendos poderes en 1778 y 1779 a favor de Martín de Perales.<sup>1905</sup> El Sargento Francisco Videla, de la Compañía del Capitán Miguel Antonio de Ayala, de la Expedición de Misiones, libró un poder en 1780 a favor de Francisco Cuello.<sup>1906</sup> En algunos casos, la gestión era realizada colectivamente, encabezada por los Sargentos y Cabos, y seguida con la firma de los soldados milicianos de sus respectivas compañías. En 1793, la oficialidad y tropa de la Compañía del Capitán Felipe Arguibel libra un poder colectivo a favor de Cipriano Moreyra, para cobrar de la Real Hacienda los sueldos devengados.<sup>1907</sup>

En las compañías de frontera, hubo siempre Baqueanos Intérpretes en calidad de soldados, algunos con paga, como Lorenzo Figueredo con \$60 al mes, dos de ración,<sup>1908</sup> y otros

"...sin otra distinción ni gratificación que algún corto tiempo de descanso que se les dispensaba a buelta de las expediciones, del seguimiento del enemigo".<sup>1909</sup>

No había la menor duda que los baqueanos como prácticos de la campaña y de las escusadas sendas por donde se introduce el enemigo

"...van en distancia avanzada de la marcha de la tropa, explorando el rastro donde se oculta o va de fuga, al mismo tiempo que buscando las aguadas para las precisas paradas de la tropa volviendo a la marcha de ella de avanzadas distancias, con la noticia de lo que habían observado, sobre la situación o cercanía en la fuga del enemigo, para que se prevenga la tropa sin ser sentida para el avance o alcance mudando caballos al efecto".<sup>1910</sup>

Estos mismos baqueanos eran

"...los espías que de noche se acercan a explorar la situación del enemigo, y guían el alcance por campos sin senda ni camino, introduciendo la tropa por bosques cuasi impenetrables, sin más rumbo ni compás que su práctica y conocimiento del rastro que deja el enemigo en su fuga, o retirada, con cuyo auxilio solo se pueden lograr los lances del alcance, castigo del enemigo y despojo de las haciendas que comunmente lleban robadas".<sup>1911</sup>

Con respecto a la localización geográfica, en ese entonces existían las que se denominaban tierras caras y tierras baratas. Un dependiente del Resguardo de la Real Renta de Tabaco de La Paz, Alto Perú, Julián Rodríguez, inició un expediente por el cobro de una rebaja de \$300 que se le hizo por los seis meses (a \$50 cada mes) que estuvo agregado al Resguardo de la ciudad de Cochabamba. Dicha rebaja obedecía a que

"...sería desproporción y disonancia que removido el dependiente de la Administración de Chuquisaca a la de Cochabamba, pasase a disfrutar a un País barato los \$300 que ha tenido de dotación".<sup>1912</sup>

A este modo de pensar, Rodríguez exclamaba indignado que

"...son las provincias iguales en los precios, por que aunque en Cochabamba el pan, las aves, y el tucullo está a menos precio, todo lo demás con inclusión de los efectos de Castilla está más caro que en las demás provincias de donde esta se surte".<sup>1913</sup>

De igual manera, en el plano militar, mientras un Capitán de Infantería en Buenos Aires disfrutaba en 1793 de \$600 al año, en Potosí alcanzaba a \$756, es decir \$156 de exceso al año.<sup>1914</sup> Y si un Teniente Coronel de Ingenieros ganaba en Buenos Aires a razón de \$1.524 anuales, ¿Cuánto debería ganar en Potosí?, se preguntaba el Teniente Coronel de Ingenieros Joaquín Antonio Mosquera. Mosquera concluía en 1793 que en Potosí

"...sin violencia parece podría graduarse mi sueldo aquí de hasta \$2.000, siendo constante disfruto en la Capital \$1.524, resultando de este modo el aumento de solos \$476 al año".<sup>1915</sup>

Este aumento no sería excesivo, pues si se tenía en cuenta que en Potosí un Capitán Infante cobraba un exceso anual sobre el de Buenos Aires de \$156, un Teniente Coronel de Infantería debería tener sobre el de Buenos Aires, un exceso de \$300, y un Teniente Coronel de Ingenieros debería gozar de "...\$176 más que el de Infantería [es decir \$476 de exceso]".<sup>1916</sup>

Índice

- U-I Tradición historiográfica en materia eclesiástica
- U-II Capellanes con congrua.
- U-III Número de capellanías colacionadas.
- U-IV Nivel de vida de los curas.
- U-V Lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.
- U-VI Abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.
- U-VII Fondos con que contaban los frailes.
- U-VIII Provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas.

**Introducción del capítulo I-F-22**

Amén del creciente endeudamiento de las elites criollas con la Iglesia, provocada por los censos y las capellanías; y la profunda animadversión contra la Iglesia, engendrada por las desigualdades inherentes a la concesión de los Patronatos y las Capellanías, estudiado en otros trabajos de este autor;<sup>1917</sup> la animosidad del bajo clero contra el alto clero y los continuos conflictos entre el clero y el estado habría obedecido a:

- a) la escasez de becas de gracia para seguir la carrera eclesiástica;
- b) los prolongados interinatos para cubrir las vacantes eclesiásticas mayores y menores;
- c) el comportamiento de los Examinadores Sinodales y los Comisarios del Santo Oficio de la Inquisición en los concursos u oposiciones de curatos;
- d) las dispensas o licencias canónicas para obviar los casos de ilegitimidad y mezcla de razas, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos;<sup>1918</sup>
- e) la conducta de los Patronos para con los capellanes interinos;
- y f) la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas racistas y regalistas de la Corona, entre las cuales las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venían a restringirle y/o sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseían. Si bien Levaggi (1986) sostiene la inocuidad de los efectos de dicha Real Cédula para la economía de la región, reconoce en cambio su potencial peligrosidad.<sup>1919</sup>

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, y cuyo costo de vida era por lo general alto, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras, contribuyeron o no a fortalecer una presión clerical patrimonialista y señorial. También nos preguntamos si la escasez de capellanías y su bajo monto promedio, alimentó el resentimiento del clero contra la Corona y la Iglesia. Para ello hemos debido detectar, relevar y procesar en una sola tabla centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos, y estudiar un centenar de litigios

de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalicias de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires;<sup>1920</sup> y en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).<sup>1921</sup> A los efectos de esta investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fue preciso completar los apellidos de los fundadores y beneficiados de las capellanías y obras pías con los apellidos maternos, sirviéndose para ello de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>1922</sup> así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>1923</sup>

## **U-I Tradición historiográfica en materia eclesiástica**

El espíritu de rebelión del clero criollo contra el gobierno español ha sido motivo frecuente de polémicas entre los Americanistas. A juicio de Lavallé (1982), los conflictos registrados entre los frailes de las órdenes religiosas en oportunidad de celebrarse los capítulos de las respectivas ordenes obedecían a la necesidad que tenían las autoridades elegidas de colocar en curatos y doctrinas a la clientela de frailes que los habían apoyado. En apoyo de esa tesis, Fisher (1990) sostiene que el motivo principal de la rebelión del clero criollo fueron las tardías Reformas Borbónicas, que redujeron la estructura patrimonialista de la Iglesia --tales como la obligación de los curas de pagar sisas y alcabalas en sus transacciones comerciales,<sup>1924</sup> la desamortización y vaciamiento de sus bienes,<sup>1925</sup> y la prohibición de cobrar a los Indios oblacones y limosnas en las fiestas de tabla.<sup>1926</sup> Y para Sala i Vila (1993), entre los curas de indios, la privación del sínodo, debido a la abolición del tributo, y para Serulnikov (2006) la abolición de las veintenías, fue lo que generó los mayores conflictos. En cuanto al motivo por el cual el clero secular porteño se volcó a favor de la Revolución de Independencia, para Avellá Cháfer (1980-81), inspirado probablemente en Carbia (1915,1945), obedeció a "...las angustias de una deficiente economía", que hacía que dicho clero fuera "pobre por antonomasia".<sup>1927</sup> Para Levaggi (1990), refutando a Socolow (1978) y a Auza (1981), la principal fuente de sostenimiento del clero, en el Buenos Aires colonial y revolucionario, no fueron las rentas fiscales --como el diezmo o las capellanías eclesiásticas-- sino la congrua,<sup>1928</sup> proveniente de las capellanías laicales impuestas por los grandes comerciantes.<sup>1929</sup>

## **U-II El caso de los capellanes con congrua.**

El caso de los capellanes es ciertamente muy distinto del de los patronos de capellanías. En Europa, y en especial en Francia, la Iglesia patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la Iglesia burocrática Borbónica.<sup>1930</sup> En Nueva España, las cuatro quintas partes del clero secular de fines del siglo XVIII, que engrosaron los ejércitos de Hidalgo y Morelos, no contaron según Barnadas (1984), con congrua alguna.<sup>1931</sup> Olaechea (1992) insiste en la presencia de una estratificación social en el clero y en el rol que tuvieron las limitaciones regias a los Breves pontificios que dispensaban de ilegitimidades.<sup>1932</sup> Y Buenos Aires, según Azara, contaba en 1794 --fuera de los cuatro conventos existentes-- con 136 clérigos, sobre un total de 40.000 habitantes,<sup>1933</sup> o de tres (3) clérigos por cada mil habitantes, la mayoría de los cuales "...vivía anhelando prebendas".<sup>1934</sup> Lamentablemente, por desconocer gran parte de los nombres y apellidos de dichos clérigos nos es imposible identificar tanto a los que gozaban de congrua,<sup>1935</sup> como a los que no gozaban de dicha prebenda.<sup>1936</sup> En cuanto al año de la revolución, 1810, hasta ahora sabemos que de los diez (10) clérigos que apoyaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo al "partido del pueblo", sólo dos (2) de ellos gozaron de rentas capellánicas (Albariño y Grela); de los seis (6) clérigos que votaron con la tendencia conciliadora, cuatro (4) de ellos gozaron de beneficio

de capellanías (Fernández, Planchón, Alberti, y Solá); y los tres (3) que se retiraron sin votar gozaron también de capellanías (Agüero, Montes Carballo y Viola).<sup>1937</sup> Y de los 17 clérigos cuyas licencias para confesar fueron suspendidas en 1816 por su filiación realista, ocho (8) de ellos no contaban con congrua alguna.<sup>1938</sup> La Tabla E-I nos ofrece la nómina de 329 fundadores y beneficiarios de capellanías, patrimonios y obras pías, registrados notarialmente en Buenos Aires a lo largo de los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX (hasta 1820). De dicha nómina 47 resultaron presbíteros (15%), 48 doctores (15%), 15 maestros (4%) y otros 7 licenciados (2%).<sup>1939</sup>

### **U-III El número de capellanías colacionadas.**

La colación de una sola capellanía no garantizaba un nivel de vida digno de una jerarquía clerical. Avellá Cháfer (1980-81), en abierta oposición con lo afirmado en 1769 por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, asegura que para que un cura en sede urbana pudiera vivir decentemente, a la renta de una capellanía (\$100), debían añadirse necesariamente los estipendios de misas y funciones religiosas --que se obtenían sirviendo interinamente capellanías vacantes-- y el sueldo de una o varias cátedras.<sup>1940</sup> Tan pobres eran los candidatos a las ordenes sagradas y tan alto el costo de vida a que se había llegado a fines de siglo, que en 1780 el Obispo Sebastián Malvar y Pinto llegó a manifestar que las capellanías eran "...unas pías memorias cujos emolumentos no corresponden regularmente mas que a la carga de Misas establecida por sus fundadores",<sup>1941</sup> y diez años después, en 1791, el Obispo diocesano Manuel de Azamor y Ramírez se negó a conferir ordenes sagradas a quienes no fundasen, previamente, una capellanía colativa.<sup>1942</sup> Dicha negativa sufrió la consiguiente oposición del Cabildo, con sus necesarias repercusiones. Manuel de Villegas,<sup>1943</sup> había concluido en 1792 sus estudios de cuatro años de Teología y manifestó entonces tener vocación al estado de sacerdote clérigo. Los padres de Villegas, en virtud de carecer su hijo de la congrua alimenticia necesaria, y deseosos de que su vocación se realizara y pudiera impetrar no sólo las ordenes menores de acólito y lector, para lo cual aparentemente no se necesitaba ni de congrua ni de Información de Limpieza de Sangre, sino incluso las ordenes mayores de presbítero, diácono,<sup>1944</sup> y subdiácono,<sup>1945</sup> determinaron fundarle patrimonio de \$2.000.<sup>1946</sup> Pero al año siguiente, en 1793, el Obispo de Buenos Aires, en represalia por la anteriormente mencionada actitud del Cabildo, exigía para ordenarse de sacerdote la congrua de \$200 anuales de renta, equivalente a dos capellanías de \$2.000 de principal cada una. Como Joaquín Antonio López poseía en 1793 sólo una capellanía colativa eclesiástica de \$2.000 de principal, sus padres se vieron precisados a otorgarle una escritura de patrimonio por otros \$2.000 mas.<sup>1947</sup> Tampoco todos los padres tenían medios con que proporcionar a sus hijos estudios en España, Charcas, Lima, Santiago de Chile o Córdoba, que los prepararan para las ordenes sagradas.<sup>1948</sup> Aún para los que abundaban en proporciones, el Cabildo Eclesiástico de la ciudad de La Paz sostenía en 1795 que

"...los arredran poderosamente los gastos que se impende en la conducción, las asistencias necesarias en el tiempo de ocho o más años que han de estar niños separados de sus casas, y sobre todo, el justo recelo que les asiste de que se malogren por no encontrar deudos ni personas de satisfacción a quienes encomendarlos".<sup>1949</sup>

De estos inconvenientes resultaba "...el privarse varios jóvenes del cultivo de las Letras; o que después de serles demasiado costosa la enseñanza con los desperdicios que se dejan entender, hayan sacado poco o ningún aprovechamiento".<sup>1950</sup>

#### U-IV El nivel de vida de los curas.

Existieron en ese entonces, como lo hubo siempre, curas que gozaban de un alto nivel de vida, al acumular la propiedad de una multiplicidad de capellanías, y aquellos otros que por falta de congrua vivían del sínodo (salario eclesiástico proveniente de los novenos reales) o sirviendo capellanías interinas o mendigando limosnas para su sustento.<sup>1951</sup> Para el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo,<sup>1952</sup> Cura de la doctrina de Anguinan, La Rioja, habiendo cobrado el sínodo

"...que le correspondía de los indios tributarios de su doctrina en una partida de lienzo, por estar mandado que los Sínodos a los curas se paguen con efectos de los mismos que trabajan los Indios se formó oposición por el Subdelegado [Don Vicente Antonio Bustos] y por Dn José Noroña empeñado en que mi ...mano se pagase de su sínodo con dinero abonando la vara de lienzo a dos y medio reales, quando acá se le cargaba a quatro reales".<sup>1953</sup>

En este caso, el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo se resistía al proyecto de que Dn. José de San Román y Castro,<sup>1954</sup> el Teniente Ministro de Real Hacienda, Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,<sup>1955</sup> y el Subdelegado Bustos "...tomasen los lienzos para negociar con ellos".<sup>1956</sup> Para el Pbro. Leopoldo de Allende, Cura Rector del Colegio Real de Loreto, en Córdoba, la multiplicidad de beneficios o capellanías sólo era ofensiva del espíritu de la Iglesia "...cuando ellas son entre sí incompatibles".<sup>1957</sup> Perseguir dicha multiplicidad era para Allende "...constituirse en rígido censor en estas materias, y escrupulizar demasiado quando no hay fundamento para ello".<sup>1958</sup> Dos o tres capellanías eran compatibles en un mismo sujeto "...especialmente si son tenues y de cortas obvenções".<sup>1959</sup> En Buenos Aires, la Tabla E-I enumera los casos de dos beneficiarios (Francisco de Cossio y Therán y Manuel José Mansilla) que fueron dotados de cuatro capellanías, siete beneficiarios (Aldao, Arraga, Caviedes, Madera, Peña, Warnes y Zapiola) que lo fueron de tres capellanías, y 58 beneficiarios que lo fueron de dos capellanías. Por lo general, la primer capellanía era proveída por los padres o ascendientes, y la segunda por otros parientes o benefactores. En el caso del Pbro. Domingo Caviedes, la primer capellanía le fue impuesta por su madre, María Catalina Pizarro, la segunda por su cuñado el gran comerciante Francisco Tellechea, y la tercera por una benefactora, María Josefa Echeverría, viuda de Miguel de Igarzábal.<sup>1960</sup> En el caso del Pbro. Pedro García de Zúñiga, la primer capellanía le fue impuesta en 1760 por su padre Alonso García de Zúñiga, la segunda 34 años después por su hermana Juana Josefa, viuda de José María Calceite, y la tercera en 1803 por su hermano Juan Francisco García de Zúñiga.<sup>1961</sup> Por lo general, los beneficiarios de capellanías las servían en los curatos del obispado donde se hallaban ordenados. Aspirar a servir una capellanía alejada del lugar de residencia, era por lo general improbable, por cuanto en las oposiciones de curatos se prefería a aquellos curas que pertenecían al vecindario. En algunos pocos casos los beneficiarios de capellanías podían servir las en curatos ajenos a la diócesis de origen, para lo cual se requerían cartas dimisorias. En 1756 el Dr. Pedro José Crespo se presentó al Obispo de Buenos Aires Marcellano y Agramont solicitando dimisorias para ser presentadas al Obispo de Córdoba Pedro Miguel Argandoña, y recibir desde la tonsura hasta el presbiterado.<sup>1962</sup> Y el Pbro. Manuel Mariano Paz,<sup>1963</sup> servía en Córdoba una capellanía fundada en Buenos Aires por su tía abuela Isabel Rosa González.<sup>1964</sup> Aquellos curas que por falta de congrua vivían sirviendo capellanías interinas debían litigar permanentemente con los Patronos de las capellanías legas, para

quienes la prioridad de los beneficios siempre se buscaba que recayese en los parientes de los fundadores. En Buenos Aires, en la instancia suscitada por el Pbro. Eugenio Cueli,<sup>1965</sup> contra Matías de Echavarría,<sup>1966</sup> apoderado de Pedro González y Pozo,<sup>1967</sup> patrono de la capellanía fundada por Beatriz Giménez Naharro,<sup>1968</sup> sobre el derecho del primero a la capellanía interina, el segundo alegó no haber habido nombramiento expreso alguno, y sí sólo una autorización para poder decir treinta (30) misas al año.<sup>1969</sup> Echavarría argumentaba en su descargo que su intención fue sólo socorrer a Cueli con la limosna o gracia,

"...no de aquellas que producen obligación..., [y sí] sin ligarme a tiempo determinado, ni de por vida, sino hasta que el Patrono Pedro González y Pozo determinase en la materia, pues a éste correspondía deliberar y no a mí, que no tuve su poder para estos fines".<sup>1970</sup>

Si bien Echavarría reconocía haber usado el término de interino, aclaraba que la misma "...no puede entenderse a todos los proventos de la capellanía, sino a sola la dotación de las misas".<sup>1971</sup> Asimismo, José Alberto Cálcena de Echevarría, apoderado del Pbro. Gregorio Antonio de Aguiar, también pariente de la fundadora, alegaba en el expediente donde litigó con Matías de Echavarría, que la dotación que hicieron los albaceas a favor de los capellanes "...no fue perpetua, sino reducida al tiempo que el predilecto Don José Barón se ordenase y estuviese en el Colegio".<sup>1972</sup> Habiendo Juan José Barón del Pozo,<sup>1973</sup> abandonado los estudios, Echavarría alegaba que el Patrono "...pudo y debió disponer del superavit, a favor de quien quisiese".<sup>1974</sup>

En regiones como Buenos Aires, polo articulador de un comercio a larga distancia, los ingresos del clero se vieron afectados por los altibajos del tráfico ultramarino. El que fuera Cura interino de la Catedral de Buenos Aires Francisco Antonio de Esparza,<sup>1975</sup> pese a haberse beneficiado con los frutos de dos capellanías, demandaba en 1769 el desalojo de los ocupantes de las tierras de chacra heredadas de su padre José de Esparza, ubicadas en el pago de las Conchas.<sup>1976</sup> El Cura y Vicario Interino de Areco Fr. Juan Pablo Fretes,<sup>1977</sup> luego de haberse beneficiado en 1783 con un par de capellanías, fue acusado en 1785 de solicitarle a María Díaz un legado, cuando aún ella vivía, motivo por el cual fue acusado del delito de captación de herencia,<sup>1978</sup> por el Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, de cuyas resultas el Cabildo Eclesiástico lo separó del interinato.<sup>1979</sup> El Pbro. Juan Antonio Suero,<sup>1980</sup> luego de haberle ganado un pleito a la sucesión del Canónigo Juan Baltasar Maciel, inició otro litigio contra la sucesión de María Josefa Bazurco, que lo perdió, pues el papel firmado por ésta, en la que disponía que la casa solar pasara a poder de Suero, después de la muerte de Maciel, se demostró que era apócrifo.<sup>1981</sup> El Teniente Cura de la Colonia del Sacramento Manuel Guerrero, pese a haber sido beneficiado en 1787 con una capellanía, solicitó ese mismo año se le asignara gratificación por la enseñanza de primeras letras que daba a los niños.<sup>1982</sup> Cuando en 1805 la Corona impuso la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, numerosos curas, usufructuarios de capellanías, solicitaron de la Real Hacienda se los eximiera de la contribución del 15% correspondiente a las mismas.<sup>1983</sup> Y cuando en 1809, el Provisor del Obispado y Juez Hacedor de la Junta Superior de Diezmos Dr. Mariano Zavaleta reclamaba del Cabildo Eclesiástico le regulase o liquidase el sueldo de \$400 anuales que le era debido, los Doctores Francisco X. Zamudio, Melchor Fernández y Domingo Estanislao Belgrano, miembros del Cabildo Eclesiástico, adujeron en protesta a dicho reclamo que

"...no debía esperarse que para un eclesiástico que posee por otra parte cuantiosos bienes de fortuna, pudiese mas en su estimación el sueldo despreciable de 400 pesos anuales que la satisfacción y honra de servir a la Iglesia de Dios, al Rey, y a su mismo Prelado, que le ha puesto a la cabeza del clero, y conferido cuantas dignidades ha podido, con preferencia a otros muchos eclesiásticos de la Diócesis idóneos y beneméritos".<sup>1984</sup>

Dicha protesta no fue óbice para que el propio Chantre de la Catedral Melchor Fernández, uno de los tres críticos del Juez Zavaleta, terminara por imitar a este último, pues en 1811 promovió el desalojo del Lic. Salvio Gaffarot,<sup>1985</sup> de la casa que ocupaba, por necesitarla "...para su mejor asistencia y servicio".<sup>1986</sup> Por último, en vísperas de la revolución de Mayo, y debido al "...ínfimo grado de decadencia a que han llegado en este tiempo los Diezmos", dichos miembros del Cabildo Eclesiástico declaraban que ellos mismos se hallaban incongruos, al extremo de haberle propuesto al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros suspendiera la anualidad y los Reales Novenos íntegros, con los cuales podía dotar en cambio las Dignidades, Canongías y Prebendas.<sup>1987</sup>

Del interior desconocemos las proporciones entre beneficiarios de capellanías y miembros de la jerarquía eclesiástica por cuanto, salvo los excelentes trabajos de Pozzi y Ferrazzano (1973) y Caretta de Gauffin (1993), no existen hasta el momento estudios realizados sobre la base de las fuentes notariales. Pero no siempre las capellanías y los diezmos proveían de los réditos e ingresos suficientes como para sustentar las necesidades vitales de los curas párrocos. La diversa constitución económica de las distintas regiones que conformaron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, en cuanto al número y calidad de sus moradores, condicionaba los ingresos a que eran acreedores los clérigos.<sup>1988</sup> En regiones donde no abundaban el comercio y las rentas fiscales (sisa y alcabala) derivadas del mismo, por lo general los curatos rurales o indígenas, el peso de los recursos recaía en las rentas fiscales (sínodos provenientes de los tributos en los curatos indígenas o de los diezmos en los curatos de españoles) o en los llamados aranceles (estipendios de misas, primicias, oblaciones y limosnas), o en el reparto forzoso de bulas e indultos,<sup>1989</sup> para cuyo cobro compulsivo, los curas muchas veces recurrieron a las Milicias provinciales, al extremo que el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir dichas prácticas.<sup>1990</sup> Hemos visto en otro trabajo como en el Alto Perú el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde fundó en el siglo XVII numerosas memorias pías por valor de \$26.000,<sup>1991</sup> y la dueña de un inmenso obraje de paños, Doña Juana de Oquendo y Enríquez, fundó once capellanías por valor de \$46.000, beneficiando con sus rentas a numerosos capellanes.<sup>1992</sup> Por el contrario, en regiones como el Paraguay, carentes de circulante metálico, donde las capellanías brillaban por su ausencia, el salario de los curas debía ser cubierto sólo por los Reales Novenos.<sup>1993</sup> A propósito de ello, en 1784 se suscitó un prolongado litigio cuando el Cura Rector interino de la Catedral de Asunción José Gregorio de Ocampos reclamó todos los salarios correspondientes al tiempo en que había servido el curato.<sup>1994</sup> Pero justamente por haber sido su cargo interino, el Fiscal de Real Hacienda adujo que pasados los cuatro meses de haber sido nombrado cura interino y de no ser provisto en propiedad, los salarios pertenecían al Rey y dejaban de ser frutos del beneficio. A lo que Ocampos replicaba que

"...si los salarios de los curatos se consignan frutos del beneficio en rentas decimales, y son tales cuando el cura propio sirve el beneficio; siempre deben ser frutos del beneficio, y deben pertenecer al que le sirve".<sup>1995</sup>

En cuanto al plazo de los cuatro meses, Ocampos alegaba

"...que es voluntariedad decir que son frutos del beneficio, en cuanto a la cuota correspondiente a los cuatro meses, y no en cuanto a lo demás: una vez que son frutos del beneficio, han de seguir al beneficio por todo el tiempo que este se sirva".<sup>1996</sup>

#### **U-V La lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.**

La lucha clientelística por el reparto de los curatos y doctrinas se manifestaba en los capítulos religiosos, donde se elegía a los Provinciales de las ordenes religiosas, los cuales amenazaban desatar serios conflictos.<sup>1997</sup> En estos capítulos, a juzgar por la opinión de Lavallé (1993), solo votaban los frailes sacerdotes, lo que excluía a los novicios y a los legos.<sup>1998</sup> Un caso relevante se dio en Córdoba, en el atrio de la Iglesia de la Merced, en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas.<sup>1999</sup> Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico --donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos-- las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Fr. Pedro Pablo de Allende,<sup>2000</sup> ante el Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.<sup>2001</sup> Fue entonces, a partir de dicho proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".<sup>2002</sup> Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.<sup>2003</sup> En efecto, el R.P. Provincial Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio Rodríguez Flores,<sup>2004</sup> Simón Rodríguez Flores,<sup>2005</sup> Lorenzo López de Osornio,<sup>2006</sup> Vicente Chaparro,<sup>2007</sup> y José Esquivel,<sup>2008</sup> aparentemente por haberse solidarizado en el pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del convento.<sup>2009</sup> Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-Chilenos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>2010</sup> encargado de la recepción del Ramo de Sisa.<sup>2011</sup> El Virrey Amat dió su apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Chilenos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y León.<sup>2012</sup> Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaran el asilo eclesiástico para sus andanzas.<sup>2013</sup> Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los que practicaban el contrabando, principal acción colectiva destinada a combatir el monopolio comercial de las casas matrices de Cádiz, quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.<sup>2014</sup> Asimismo, los religiosos ligados a los intereses pro-Chilenos recurrieron al Metropolitano residente en Santiago de Chile contra la autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-Chilenos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en

mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.<sup>2015</sup> Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclaró el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictamen", violatorio de los fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>2016</sup> había dado al Teniente de Rey Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,<sup>2017</sup> a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,<sup>2018</sup> y José Martínez y González.<sup>2019</sup> Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,<sup>2020</sup> condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,<sup>2021</sup> y Santiago de Allende y Losa.<sup>2022</sup>

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas y por una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una acción colectiva violenta, por cuanto se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por el cobro de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los curatos y doctrinas y de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,<sup>2023</sup> y publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los Echenique,<sup>2024</sup> habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte hombres armados, a pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.<sup>2025</sup> En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para invadirle".<sup>2026</sup> De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que sufragaba a los auxiliantes, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".<sup>2027</sup>

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caja por las cuadras y cantones públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".<sup>2028</sup>

Como trágica secuela de estas acciones el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General José Francisco de Galarza,<sup>2029</sup> fue ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".<sup>2030</sup>

#### **U-VI El abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.**

El abuso con que en el Alto Perú eran cobradas las primicias, oblaciones y limosnas dio lugar a que las autoridades civiles los motejaran de repartimientos forzosos. A tal extremo llegaron dichos abusos que en 1796 el Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz, indignado por la oposición del clero a la Mita Nueva de Chayanta, propuso diversos medios para abolirlos.<sup>2031</sup> Estos fueron, a saber:

- a) la reunión de Beneficios;
- b) la aplicación de diezmos;
- c) el establecimiento de colectas;
- d) la aplicación de los sobrantes del noveno y medio de la fábrica de la Catedral, proveniente del Ramo de Diezmos;
- y e) la cuota impuesta sobre las rentas de los Curatos vacantes.

En su negativa respuesta al Gobernador, el Arzobispo Juan Antonio de San Alberto manifestaba que en un curato de los que se llamaban pingües, con Sínodo entero de fiestas, que no todos lo tienen, de numerosa feligresía, si el total de su ingreso llegaba por ejemplo a \$4.000, no quedan los dos tercios libres para la congrua sustentación del Cura.<sup>2032</sup> Será esta, se preguntaba San Alberto,

"...una dotación excesiva para un Eclesiástico, que después de haber consumido tal vez los fondos de su casa en seguir muchos años la carrera de las escuelas, tan costosas en estos países, después de haber servido de Cura o de Teniente en otros Beneficios infelices en que no ha tenido otra dotación, que la miseria, ha logrado por fin en virtud de sus servicios la promoción a uno de renta regular?".<sup>2033</sup>

También se preguntaba San Alberto si sería esta dotación excesiva "¿...para unos vasallos, que en todos tiempos y en todas circunstancias se han distinguido por su amor, fidelidad, y respeto al soberano?".<sup>2034</sup> Las provincias de Porco, Pilaya, Tomina, Yamparaez y Cochabamba se mantuvieron en paz durante las pasadas revoluciones; y las de Paria, Sicasica, Chichas y Chayanta fueron apaciguadas, según San Alberto, gracias a la labor de los Curas

"...¿Quienes mejor que ellos, sacrificaron sus intereses, expusieron su salud, perdieron su propia vida, por la paz de las Provincias, y servicio del Soberano, quedando unos despojados de todos sus bienes, otros heridos, y otros muertos?"<sup>2035</sup>

En sólo la provincia de Chayanta, por no abandonar su feligresía, habían perdido la vida el Párroco de Aymaya Dr. Dionicio Cortés, y el de San Pedro de Buena Vista Dr. Isidro Herrera, con otros cinco Eclesiásticos más "...¿Quienes en aquellas críticas circunstancias, abandonadas las provincias por sus Corregidores, recaudaron y entregaron con aumento de muchos miles el Real Ramo de Tributos, sino los Curas?"<sup>2036</sup> Y en la provincia de Porco, la gruesa puesta por los Curas en las Reales Cajas había excedido en treinta mil pesos a la suma que enteraba su Corregidor. "...¿Quienes en la guerra presente contra la Francia se han distinguido tanto, como los Curas, haciendo en medio de sus cortas rentas considerables y anuales donativos para ayuda de los indispensables gastos del Soberano?"<sup>2037</sup> "¿Será dotación excesiva para unos Lugares, que distando, 40, 80, o 100 leguas de los Poblados, hacen más costosa la conducción de los víveres de que carecen".<sup>2038</sup> Por el mismo caso de no haber otros recursos, la casa del Cura,

"...debía ser simultáneamente el hospedaje, la botica, la despensa y la ropería de todos. El hospedaje general para todos los pasajeros y peregrinos? La Botica para administrar los medicamentos a todos los feligreses enfermos? La despensa universal para el socorro de los hambrientos y miserables, y la ropería para cubrir sus desnudeces?"<sup>2039</sup>

En medio de esta pretendida abundancia de los Curas, exclamaba el Arzobispo San Alberto,

"...los que obtienen los mejores Curatos suspiran y anhelan por una Prebenda aún de Media Ración, cuya renta es notoriamente corta. Prueba auténtica de que, o la dotación del Curato no es excedente en mucho a la de la Prebenda, o que si lo es, no recompensa en exceso las indecibles fatigas del Ministerio".<sup>2040</sup>

Las quejas y declamaciones del Arzobispo contra los empeños que oprimían a los Prelados en los Concursos a Curatos "...no prueban las pingües rentas de los Beneficios, si no que aún cuando fueran mucho más pobres de lo que son, la miseria y necesidad los haría apetecibles".<sup>2041</sup> Para el concurso entre un rico y un pobre, ambos igualmente idóneos, se tenía entonces a la vista la obra del canonista Francisco A. Mostazo (1680),<sup>2042</sup> para quien "...debe el segundo preferirse al primero".<sup>2043</sup>

La batería de métodos recomendados por el Gobernador, el Obispo San Alberto no los creía "...adaptables ni verificables en estos Payses".<sup>2044</sup> La reunión de Beneficios era impracticable, porque si en virtud de la vasta extensión de cada Doctrina "...ha mandado S.M. repetidamente la división de Curatos, ¿como pensaremos ahora en reunirlos?"<sup>2045</sup> La aplicación de los Diezmos y Primicias también era impracticable por cuanto de la Masa Decimal se distribuían los Reales Novenos, la Renta de la Dignidad Episcopal, la dotación de las Dignidades, Canongías y Prebendas, los Alimentos del Hospital Real, y parte de los del Seminario, fondo de fábrica para la Iglesia Catedral, salarios de sus Ministros subalternos, Música y Sirvientes. Si se adjudicaban a los Curas los Diezmos, de donde saldrán, se preguntaba San Alberto, "...los caudales necesarios para estos diversos destinos?"<sup>2046</sup> Sobre el tercer arbitrio de las Colectas podría decir a V.S. "...que por equivalente a ellas [las Colectas] aprobó el Arancel las oblaciones de las fiestas [de

tabla]".<sup>2047</sup> El Prelado que formó los Aranceles y el Tribunal que los aprobó "...debieron sin duda tener presente que menos inconvenientes traía autorizar las fiestas establecidas ya de tiempo inmemorial, que instituir las Derramas [colectas] en cuya cobranza eran inevitables las extorsiones y abusos".<sup>2048</sup> Por ello, el Prelado había prohibido las contribuciones de uno o dos reales, que con el nombre de Rama "...había en algunos curatos para la Cera del Monumento y gastos de Semana Santa".<sup>2049</sup> En efecto, se preguntaba San Alberto ¿a cargo de quien correría la cobranza de las Colectas? En caso de ser elegidos los Caciques

"...¿ignora acaso las extorsiones, violencias, picardías, y exacciones inicuas, de que estos por la mayor parte usan con los miserables indios aún en aquellos ramos, que por necesidad indispensable corren a su cargo?".<sup>2050</sup>

Finalmente, San Alberto argüía, en la hipótesis que las Colectas ya hubieren sido establecidas,

"...No se podría decir de ellas lo que V.S. dice ahora de las fiestas, que no pudiendo los Indios como verdaderos neófitos conocer las diferencias que los Cánones establecen entre el precio de las cosas sagradas y el estipendio de los Ministros que las actúan, podrían sospecharlas simoníacas?".<sup>2051</sup>

Al verse pensionados los Indios con las Colectas "...¿no se escandalizarían como ignorantes y pequeñuelos, o creerían erróneamente que habían comprado su conversión al precio del oro y la plata?".<sup>2052</sup>

#### **U-VII Los fondos con que contaban los frailes.**

Los fondos con que contaban los frailes, provenientes de principales formados por bienes inmuebles rurales, obtenidos por donación o adquisición, estaban expuestos a la arbitrariedad de las autoridades religiosas impuestas por las jurisdicciones cabeceras, que en muchos casos llevaron a las Comunidades religiosas instaladas en regiones periféricas a un total vaciamiento o ruina. Estando de viaje el Prior del Convento de Predicadores de San Juan Fr. Cayetano Bastidas, de San Juan camino a Chile, con licencia del Juzgado de primer voto del Cabildo de San Juan, sus Religiosos se decidieron a representar ante el Cabildo Eclesiástico para que oficiase al R.P. Superior de la Orden Dominica y su Consejo Conventual a fin de que se oyese sus clamores. Lamentablemente para los Religiosos el pedido fue denegado "...al pretexto de que no estaba facultado para ello".<sup>2053</sup> Citada la Comunidad por el P. Superior Fr. Francisco Albarracín,<sup>2054</sup> para "...hacer saber y leer una Patente de Vicario Prior" que había librado el Prior Bastidas en favor del P. Procurador Fr. Isidro González, los Religiosos suplicaron (protestaron) de dicho nombramiento y solicitaron que no se leyese la patente,<sup>2055</sup> bajo apercibimiento de introducir un recurso de fuerza por ante el Cabildo de San Juan,

"...porque el citado Fr. Isidro tenía que contestar como Procurador a los cargos que se citan y que últimamente era reo, y estaba incurso en la pena de propietario,<sup>2056</sup> por haber gastado dineros que no habían entrado al depósito".<sup>2057</sup>

Ante tan graves cargos, Fr. Albarracín hizo lugar a la solicitud arguyendo que la patente no había venido acompañada con el pase del Cabildo Eclesiástico. Respecto de los principales que se habían redimido, de las tierras y fincas que se habían enajenado, y de los arrendamientos a Temporalidades que se habían tomado "...sin que el Concejo haya tenido

parte, ni los Depositarios hayan tomado conocimiento en la materia", se preguntaban los Religiosos "...¿A quien ha entregado [el P. Procurador Fr. Isidro González] esos principales para su custodia, ni en que depósito y depositarios deberán hallarse, si no hay depósito ni depositarios?".<sup>2058</sup> Más aún, a todos los Religiosos les constaba que en tiempos en que Fr. Isidro regenteaba la Procuraduría "...se ha perdido al todo la viña del Molino del Pueblo Viejo, la viña que llaman del Padre Sánchez, y la viña de Espinosa".<sup>2059</sup> Por el descuido, omisión y tolerancia del P. Procurador los Religiosos denunciaban tener "...perdido el servicio de los esclavos", unos en manos de comerciantes, otros de tunantes, y los demás de vagamundos, por las calles y pulperías, "...viéndose obligado a conchabar algunos peones para lo poco o nada que se cultivan las haciendas".<sup>2060</sup> De entregarse el gobierno del Convento al P. Procurador, los Religiosos se preguntaban "...¿que arreglo deberá esperarse en el gobierno de un hombre que por tantos años ha estado sujeto a las penas de propietario, sin temer que al cabo de tanta continuación se las apliquen?".<sup>2061</sup> En el caso de ser designado Prior, Fr. Isidro

"...perseguiría a sangre y fuego a cuantos pudieran serle estorbo en su despótico gobierno para entrar y salir por los intereses del Convento a plena satisfacción".<sup>2062</sup>

Procuraría también Fr. Isidro

"...el extrañamiento como está de costumbre [sin duda refiriéndose a lo acontecido en 1766 en el convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba], de aquellos Religiosos, que contemple no han de venir en sus perjudiciales antojos; y que llevados de su religioso espíritu no han de contribuir con su voto a colocarle en el candelero de oro del Priorato".<sup>2063</sup>

Como despedido

"...ha prometido hacer hasta el último esfuerzo a fin de comprar con el vil precio de la iniquidad la preciosa margarita del gobierno [priorato],...que es el alma y el móvil de los desarreglos que ha causado y va causando con escándalo del Pueblo".<sup>2064</sup>

Para obtener dicho priorato "...recorre las campañas con sus ambiciosas diligencias al gobierno, hasta pillar a laso un voto ciego, que tiene a su pésima devoción".<sup>2065</sup> En el afán de suceder al P. Superior, Fr. Isidro González

"...anticipa esfuerzos, busca sufragios, se vale de los medios más inícuos, para lograr sus designios depravados, y viendo que el lugar que desea ocupar, no ha llegado con dolor suyo al estado de vacuo, ha pretendido hacer creer a Vuesa Paternidad, que otros con anticipación solicitan la futura sucesión".<sup>2066</sup>

#### **U-VIII La provisión de obispos, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas.**

En cuanto a la provisión de obispos, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas en Juntas Municipales de Propios y Temporalidades, así como de Contadurías Reales en las Mesas Decimales de los Obispos, de Sindicaturas en los Monasterios, y de Contadurías y Tesorerías en el Santo

Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, variaba según que se tratase del clero regular o del secular. La provisión de un curato o el pase o traslado de un curato infeliz o de renta irregular a uno pingüe o de renta regular, requería de las correspondientes gratificaciones, o en su defecto de muy buenas influencias o parentescos. Carbia (1929) y Avellá Cháfer (1983) detectaron la existencia de casos de patrimonialismo clerical, a los cuales caracterizaron como típicos casos de simonía.<sup>2067</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos en carta a Domingo Sánchez Barrero, residente en Madrid, le decía en 1778 que

"...el sujeto que haga de Presidente en el Capítulo [Franciscano] no puede ser electo Provincial en aquella elección según su Constitución y como mi deseo es poner la capa de Provincial [de la Orden en Tucumán] a mi tío el P. M. G. por eso pedí viniese la Presidencia en primer lugar a favor del P. M. Fr. J. de S.; en 2o. a D. P. M. G.; en 3o. al P. M. Fr. J. J. E. y en 4o. a favor del P. P. Fr. J. A. B. porque biniendo nombrado el 1o. lograba mi deseo y con los demás se aseguraba el partido para la siguiente elección; en cuías circunstancias me ha parecido prevenirlo a V.M. para que tenga presente se observe el orn. prevenido, reservándolo y también el logro del P. M. S. porque es nombramiento que solo se manifiesta al tpo. de entrar a la elección, y saviendose antes pudiera sernos perjudicial".<sup>2068</sup>

Asimismo, Gutiérrez de Cevallos le manifestaba a Sánchez Barrero que

"...en esta Prova. [Tucumán] spre. ha auido un religioso nombrado por el gral. con la facultad de graduar a los que lograban sus Patentes y como murió el que obtenía este encargo, estimaré a V. M. lo solicite a favor del P. M. G. como igualmente el nombramiento de Juez General de Expolios de esta Pcia. del Tucumán, porque uno y otro encargo solo sirve para honor y representación, cuías satisfacciones y distinciones deseo a mi tío, y de su mérito y circunstancias está vien impuesto su amigo de V. M. el Rdo. Secretario General".<sup>2069</sup>

El Pbro. Juan Manuel Fernández de Agüero había aceptado en 1790 de manos del Párroco Antonio Pío de Aguiar la suma de \$400, con tal que el anhelado cargo de capellán de la segunda partida de Demarcación de Límites con Portugal recayera en su persona, motivo por el cual ambos fueron acusados de practicar simonía.<sup>2070</sup> Y en oportunidad de la admisión de la renuncia del Obispo de Arequipa, y la solicitud de la vacante por parte del Obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso, el Deán del Cabildo Eclesiástico de Córdoba Gregorio Funes,<sup>2071</sup> escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, Joaquín Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los recursos de su favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante estaba siendo solicitada "con desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo del Paraguay Nicolás Videla del Pino.<sup>2072</sup> Envuelto en su polémica con el Dr. José Ignacio Olmedo, un sobrino nieto del Deán Funes, Carbia creyó ver en las gestiones del Deán un claro caso de simonía, al gestionar con dinero el obispado de Córdoba.<sup>2073</sup> En efecto, Funes escribía a su agente que "...contemplando que acaso no tendría Vd. el dinero necesario para vencer las dificultades que ocurran, y no pudiendo en el día hacerle una remesa con la celeridad que exige el asunto, solicité quien me lo facilitase en esa corte...".<sup>2074</sup> Adrián (1991) nos relata también como la titularidad de los beneficios de San Pedro de Macha y Chairapata unidos, estaba siendo gestionada tanto por el Cura de Chairapata Miguel de Arzadúm como por el Cura de Chayanta Gregorio de Merlos.<sup>2075</sup> El oficio de Tesorero General de la Santa Cruzada, a cargo de la venta de las Bulas y las licencias para capillas,

se subastaba en Lima.<sup>2076</sup> En la década del 40, el Tribunal de la Santa Cruzada, remató el cargo de Tesorero en el Río de la Plata en Antonio Rivadeneyra.<sup>2077</sup>

En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las élites señoriales locales, podemos afirmar que el Clero habría participado fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y fluidez de un mercado de capitales, y en beneficio de los curatos urbanos y en perjuicio de los rurales. Como los curatos rurales dependían casi enteramente de las transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra el gobierno español.<sup>2078</sup>

## Capítulo I-F-23

### **Presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social.**

#### Índice

- V-I Tradición historiográfica en materia de crédito eclesiástico
- V-II Voluntad de fundar capellanías y patrimonios.
- V-III Fundadores de capellanías y primeros patronos.
- V-IV Longevidad o abolengo de las capellanías.
- V-V Censos a favor de conventos o monasterios.
- V-VI Ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.
- V-VII Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.
- V-VIII Deudores de censos y réditos de capellanías.
- V-IX Plazos de redención y renovación de los censos.
- V-X Oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y renovación de los censos.
- V-XI Base económica de la pirámide financiera eclesiástica.
- V-XII Naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.
- V-XIII Tenor de las tasas de interés.

## **Introducción del capítulo I-F-23**

Concretamente, con relación a la modernidad o antigüedad de los conceptos o categorías institucionales del censo y la capellanía debo confesar que cada vez estoy más convencido que la genealogía de los conceptos de fundación e hipoteca, pertenecientes al derecho civil moderno, tienen una relación de semejanza con los conceptos o categorías institucionales del censo y la capellanía. En ese sentido, aparte de los motivos de discriminación que sufrían los aspirantes a Patronos, por su sexo, o menor edad, practicada en la sucesión de los Patronatos Capellánicos, y la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por la aplicación de las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, estudiados en otros trabajos de este autor,<sup>2079</sup> la animadversión contra la Iglesia obedecía también a la conducta de los patronos en la administración de las capellanías laicales. Esto último ha sido por lo general oscurecido debido a la absorbedora presencia de los capellanes. La responsabilidad de los patronos

consistía en vigilar el cobro de los réditos, invertir los fondos recaudados, elegir el número de misas que se han de aplicar anualmente, presentar el capellán al Obispo cuando su identidad no estaba definida en la fundación de la capellanía, o su lugar estaba vacante por muerte del propietario del mismo, y abonarle los estipendios de sus misas y servicios.<sup>2080</sup> Las capellanías laicales o de sangre eran erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica y sus bienes se consideraban como propiedad familiar, sin poderse vender, trocar, donar ni enajenar, ni tampoco separar, dividir, asensuar, hipotecar ni gravar total ni parcialmente, y conservaban la calidad de temporales, en donde el clero era meramente depositario de los bienes de la misma.<sup>2081</sup>

Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto la sucesión de sus patronatos se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía (patrilinealidad) y la pureza de la estirpe (Limpieza de Sangre), y sus frutos se aplicaban para la pensión exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras, y a los patronos en detrimento de los capellanes interinos; la longevidad o abolengo con que esta institución perduró en el tiempo; la intensidad con que fue distribuida; la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se fundaban capellanías y patrimonios, contribuyeron o no a fortalecer un régimen clerical, patrimonialista y señorial.

Asimismo, la animadversión contra la Iglesia obedecía también al creciente endeudamiento provocado por los censos u obligaciones a censo, y a las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que se negaban a rebajar la tasa de interés y ejecutaban y embargaban a los deudores de réditos de capellanías, contribuyendo así también al fortalecimiento de un régimen clerical patrimonialista y señorial. La tremenda resistencia a rebajar las tasas de interés en el mundo colonial nos induce a pensar que en él existía un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo, lo cual explicaría en parte el congelamiento del precio de la tierra.

Para detectar estas operaciones de censos hemos debido relevar y procesar en numerosas tablas centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y numerosos litigios, correspondientes a las series tribunalcias seglares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba.<sup>2082</sup> A los efectos de la investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fué preciso también completar los apellidos de los censatarios o deudores y de los censualistas o acreedores con los apellidos maternos, sirviéndonos para ello de la información genealógica que nos proveen los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>2083</sup>

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor del crédito de compra. En principio, postulamos la hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación negativa entre las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y estancias) por un lado y el fiado de Castilla por el otro. Mientras los frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), la adquisición y poblamiento de chacras y estancias, y la industria de la construcción, se enfrentaban a la moneda-circulación mediante los instrumentos del censo y las obligaciones a réditos, las mercancías importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía mediante el instrumento del fiado.

## **V-I Tradición historiográfica en materia de crédito eclesiástico**

Uno de los problemas aún no resueltos en la historiografía latinoamericana fue la caracterización del rol que desempeñó la Iglesia en la economía, la sociedad y el estado del llamado Antiguo Régimen colonial y en todo el proceso de crisis política previa a la emancipación. Por un lado, cierta historiografía atribuye entre los factores irritantes que provocaron en las elites criollas el apoyo al proceso revolucionario: a) la expulsión de los Jesuitas; y b) la disminución de las inmunidades eclesiásticas que las Reformas Borbónicas adoptaron a fines del siglo XVIII.<sup>2084</sup>

Por otro lado, la historiografía liberal insistió siempre que una de las razones más fuertes que impulsaron al bajo clero criollo a apoyar la revolución fue la discriminación que este sufría a manos de un alto clero peninsular, el cual participaba del proceso de concentración de la riqueza colonial. Para el caso de México, Barrett (1970), Taylor (1972), Bazant (1977), Castañeda y Marchena (1978) y Wobeser (1985, 1989a, 1989b, 1990) ilustraron sobradamente como el crédito eclesiástico (censos) se constituyó en el principal mecanismo de transferencia del excedente experimentado por la Iglesia Católica. Sus cálculos indicaron que las ejecuciones hipotecarias, las almonedas o remates, y las ventas de inmuebles --propiedad de las elites patricias-- a manos de la Iglesia, como medio para saldar deudas, fueron responsables del alto grado de acumulación de tierras por parte de la Iglesia. De igual manera ocurrió en el Perú. A juzgar por lo descrito por Macera (1963) y por Burga (1979), a comienzos del siglo XVIII los religiosos se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región.<sup>2085</sup> Si la Iglesia se había enriquecido, los propietarios seglares se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un cambio masivo de propietarios.<sup>2086</sup> En el Río de la Plata y Chile, por el contrario, el proceso de concentración no se dio en el rubro inmobiliario rural sino en el crediticio, ni tampoco en las zonas rurales, y sí en las zonas urbanas, y en especial en los barrios más valiosos de las mismas, afectando por ende a las embrionarias burguesías mercantiles existentes.<sup>2087</sup> Recientemente esta vieja polémica ha vuelto a resucitar.

Mientras que Cabat (1971), Gudmundson (1983), Schwaller (1985) y Burns (1991) han sostenido que en México, la América Central y el macizo Andino los ingresos de todo tipo de capellanías y obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;<sup>2088</sup> autores como Greenow (1979, 1980), Levaggi (1986), Fisher (1990) y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fue no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.<sup>2089</sup> El mismo argumento ensayaron para

España Álvarez Vázquez (1978) y Sánchez González (1991). En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a la Iglesia más como un consumidor de la riqueza colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,<sup>2090</sup> y Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como rentistas señoriales.<sup>2091</sup> En cuanto a aquellos autores que se dedicaron al Río de la Plata, sus contribuciones han padecido de los déficits propios de una historiografía fundada en una archivística por demás escuálida. Si bien Socolow (1978) estudia el rol de las capellanías en manos de grandes comerciantes omite el tratamiento de los censos y la repercusión de ambas instituciones en el proceso revolucionario; y si bien Liberti (1969) y Levaggi (1986), trabajaron el tema de las capellanías y los censos, se fundaron para ello en la incompleta información de los Libros del Obispado de Buenos Aires y de la Consolidación de Vales Reales, desestimando el tratamiento de la fuente notarial.

## **V-II La voluntad de fundar capellanías y patrimonios.**

La voluntad de fundar en Buenos Aires capellanías y patrimonios --condicionada por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se halla sobradamente ilustrada en el Gráfico A-III, fundado en la estadística ofrecida por la Tabla G-I, y por la demanda de plazas vacantes en colegios y universidades.<sup>2092</sup> A comienzos de la década del 50 se registró en Buenos Aires con motivo del Tratado de Madrid (1750) --que puso fin a las amenazas guerreras entre las colonias de España y Portugal-- un boom mercantil que se tradujo en 1752 por un record de capellanías. En efecto, el número y monto de las capellanías aumentó de dos capellanías por valor de \$1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de \$15.500 en 1752.

En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio exterior porteño quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias Portuguesas. Esta realidad llevó a que se diera entonces una muy baja propensión para fundar capellanías, que se acentuó durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1780-1782). De todas maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. Paralelamente al ascenso de las exportaciones, la demanda de ingresos al Colegio de San Carlos (Buenos Aires) aumentó, de 18 estudiantes de Filosofía a 47 en los cursos de 1777 a 1779.<sup>2093</sup> Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como España se sumó a la misma (1780), el número de capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 capellanías en 1780 y 1781 respectivamente. Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso le fue preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el otorgamiento de las órdenes sagradas. A partir de 1783 en que se registró un marcado superávit de la balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, el número y monto de las capellanías alcanzó uno de los picos máximos con 25 escrituras de fundación, por valor de \$50.812.

Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como consecuencia una mayor caída del número de nuevas capellanías registradas. En esos mismos años, de 1787 a 1789, la matrícula del Colegio de San Carlos aumentó a 89 estudiantes de Filosofía y 37 de Teología.<sup>2094</sup> Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fue altamente favorable registrándose como reflejo de la misma un prolongado incremento del número de

capellanías. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo reflejadas en las estadísticas.<sup>2095</sup> Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando las capellanías caen en forma abismal de 31 en 1798 a 17 en 1799. Debido al efecto combinado de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales y las Invasiones Inglesas (1806-07), las capellanías desaparecieron. Luego que Buenos Aires fue reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas, o cinco millones de pesos plata, arribó a Buenos Aires,<sup>2096</sup> el número de capellanías creció de una sola en 1808 a 7 en 1809.

La distribución del número de capellanías refleja en parte la naturaleza de la estructura económica y social vigente. Mientras la Tabla G-II nos ofrece la nómina de media docena de capellanías registradas en La Paz, Alto Perú, las Tabla G-I y G-III nos ofrecen la estadística y la nómina de los 584 fundadores, o primeros patronos, y de las 757 capellanías y patrimonios registradas notarialmente en Buenos Aires entre 1600 y 1820, que a un promedio de \$1.500 cada una, hacían un total aproximado al millón de pesos plata.<sup>2097</sup> A diferencia del Alto Perú, la distribución de las capellanías era en Buenos Aires bastante acentuada. Esta última Tabla enumera los casos de un fundador que instituyó trece capellanías,<sup>2098</sup> dos fundadores que instituyeron ocho capellanías cada uno,<sup>2099</sup> otros dos fundadores que instituyeron seis capellanías cada uno,<sup>2100</sup> seis fundadores de cinco capellanías cada uno,<sup>2101</sup> cinco fundadores que impusieron cuatro capellanías,<sup>2102</sup> una veintena de fundadores que lo fueron de tres capellanías (o el 4% del total de fundadores), 77 fundadores que lo fueron de dos capellanías cada uno (o el 13%), y 267 fundadores de una sola capellanía (o el 46%). Por lo general, la primera capellanía era fundada a favor de sus hijos o hermanos, y la segunda a favor de sus otros parientes o descendientes. El responsable de haber fundado la mayor cantidad de capellanías (trece capellanías), el Pbro. Marcos Rodríguez de Figueroa,<sup>2103</sup> favoreció primero la ordenación de su propio hermano carnal Domingo Soriano Rodríguez de Figueroa; y luego la de numerosos sobrinos carnales, como Francisco de Cossio Terán y Pablo Romero.<sup>2104</sup> La Tabla G-IV discrimina la información de la Tabla G-III por Convento u orden religiosa. Esta Tabla, aunque muy incompleta, por no revelarse en el texto de las capellanías de sangre la iglesia u orden religiosa donde el capellán beneficiado debía servir la capellanía, revela en cambio la escala del poder económico entre las Ordenes Religiosas. La encabeza la Orden de Santo Domingo con 34 capellanías por valor de \$40.080, seguida por la Orden de San Francisco con 19 capellanías por valor de \$25.402, y por la Orden de la Merced con 17 capellanías por valor de \$16.952. Las capellanías otorgadas a favor de la Iglesia de San Ignacio fueron secularizadas cuando la Expulsión de los Jesuitas, y pasaron a integrar los activos del ramo de Temporalidades.

### **V-III Los fundadores de capellanías y primeros patronos.**

Entre los fundadores de capellanías y primeros patronos, figuraban personajes poderosos, tales como regidores perpetuos, oficiales de ejército, clérigos, comerciantes, hacendados, síndicos de cofradías, alguaciles del Santo Oficio, Administradores de Hospitales, miembros de las Ordenes Terciarias, etc. y en mucha menor medida plebeyos o humildes vecinos, libertos y artesanos, que alcanzaron mediante su oficio a acumular algún capital. En la clase política, se registró una quincena de casos tipo, sobresaliendo Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel

Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega,<sup>2105</sup> Gaspar de Santa Coloma, Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa. En la clase militar, logré detectar a sólo dos oficiales de relevancia: el General Antonio de Larrazábal y el Coronel José Antonio de Otálora. Entre los hacendados, en un previo trabajo de mi autoría, registré una docena de casos relevantes.<sup>2106</sup>

Y entre la clase mercantil, también se registró una docena de casos paradigmáticos, sobresaliendo Nicolás de Acha, Diego de Agüero, Cristóbal de Aguirre, Vicente Azcuénaga, Tomás Balanzátegui, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan Viola, José de la Peña Fernández, Gaspar de Santa Coloma y Carlos de los Santos Valente. Algunos de ellos, como Balanzátegui, Belgrano, Rodríguez de la Vega y Viola, reunían además la condición de miembros de la Hermandad de la Caridad. La familia Lezica, íntimamente ligada al comercio mayorista a larga distancia con el Alto Perú, alcanzó a instituir 18 capellanías. Entre sus miembros, Juan Antonio de Lezica reunía también la condición de miembro de la Hermandad de la Caridad, y Juan José de Lezica y Alquiza la de Administrador del Hospital de Mujeres.<sup>2107</sup> Andrés Lezica y de la Torre,<sup>2108</sup> debió litigar con su propia madre Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho,<sup>2109</sup> en dos oportunidades, por los intereses vinculados a la capellanía fundada por su abuela materna Petrona Tagle Bracho.<sup>2110</sup> Y María Manuela de Lezica,<sup>2111</sup> también debió acudir a los estrados judiciales para defender sus intereses capellánicos.<sup>2112</sup> La familia Fernández de Agüero, distribuída en seis miembros distintos, alcanzó a instituir nueve capellanías. Entre los funcionarios fundadores de capellanías, los clérigos fueron los más numerosos registrándose 47 casos, entre los cuales hubo 18 doctores, 10 presbíteros, 4 maestros, 2 arcedianos, 4 deanes, 5 frailes y 1 beata.

También figuraban como fundadoras de capellanías, y en su consecuencia como primeros patrones, numerosas mujeres, de las poderosas y de las plebeyas. La Tabla G-III revela la existencia de 169 mujeres que fueron fundadoras, o el 28%, casi la tercera parte, de las cuales 64 eran viudas, 87 solteras, y algunas como Josefa Troncoso y Canales, Hermana Terciaria de Santo Domingo. Por último, la Tabla G-V revela la intensidad de la circulación generada por los mismos fundadores de capellanías. En dicha Tabla figuran las operaciones de censo practicadas por 82 fundadores de capellanías, que sobre un total de 584 fundadores, representaba el 14%. Entre ellos figuran comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

#### **V-IV Longevidad o abolengo de las capellanías.**

Cuanto más longevidad o abolengo padecía una capellanía, mayor era el prestigio de la familia que la detentaba y más rigurosos se volvían los criterios de legitimidad y patrilinealidad. La longevidad o abolengo de las capellanías dependía también de otros numerosos factores, entre los cuales privaba la naturaleza perpetua o redimible de la escritura otorgada y la política que cada orden religiosa seguía con respecto a las redenciones. De la extensa nómina de capellanías, ilustrada en la Tabla G-III, sólo en 61 casos hemos podido hallar la fecha de la redención. En unos pocos casos la escritura de redención fue registrada por separado, como cuando en 1726 Lucas Manuel Belorado y Antonio de Indá cancelaron sus respectivas capellanías.<sup>2113</sup> De todas las capellanías conocidas, en lo que fue el antiguo Virreinato del Río de la Plata, la más antigua aún vigente en tiempos de la revolución fue sin duda la conocida como Capellanía de Copacabana, instituida en Córdoba en 1613, por Leonor de Tejeda Miraval.<sup>2114</sup> Su

heredera en el siglo XVIII fue Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y mujer del Alcalde Provincial Domingo de Garay.<sup>2115</sup>

Y de la nómina de capellanías registradas en Buenos Aires, elevada por el Provisor Dr. Mariano José Francisco Zavaleta al Ministro Rivadavia en 1821, publicada por Levaggi (1974), hemos podido determinar que la más antigua fue la del Obispo Fr. Pedro de Carranza, fundada en 1632; siguiéndole en orden de antigüedad las capellanías del Deán Pedro Montero de Espinosa, fundada en 1646; la del Dr. José Marcianes, fundada en 1684; la del Obispo Dr. Antonio de Ascona Imberto, fundada en 1694; y finalmente la del Canónigo Juan de Lemus, fundada en 1698.<sup>2116</sup> Asimismo, de las capellanías laicales que aún ofrecían dinero a censo a mediados del siglo XIX, la más antigua fue la del Capitán Juan del Pozo y Silva,<sup>2117</sup> que se fundó en 1662, y cuyo patronato ejercieron en el siglo XVIII su nieto el Pbro. Francisco del Pozo y Vitte,<sup>2118</sup> y en el siglo XIX su tataranieta Dolores Ramos Mexía y Ross y su chozno Ildefonso Ramos Mexía Basabilbaso.<sup>2119</sup> Le siguieron en orden de antigüedad una capellanía del Deán Marcos Rodríguez de Figueroa, que se fundó en 1684,<sup>2120</sup> y la de Domingo de Acassuso a favor de la Capilla de San Isidro, que se fundó en 1706.<sup>2121</sup>

#### **V-V Los censos a favor de conventos o monasterios.**

Amén de las capellanías, las obligaciones a réditos a favor de laicos, tutores y curadores de viudas y huérfanos, y de los censos a favor de capellanías específicas, el mecanismo más usual para hipotecar propiedades inmuebles era el de los censos a favor de conventos o monasterios. Para el autor de este trabajo, la animosidad de las élites criollas contra el alto clero habría obedecido a los innúmeros conflictos generados a causa de la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas regalistas de la Corona, entre las cuales la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venía a sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseía. Si bien Levaggi (1986) sostiene la inocuidad de los efectos de esta Ley para la economía de la región, reconoce en cambio su potencial peligrosidad.<sup>2122</sup> Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que ejecutaban y embargaban a los deudores de censos, así como las políticas regalistas (Real Cédula sobre Consolidación de Vales Reales) que so pretexto del rescate de los títulos Reales combatieron el patrimonialismo clerical, fueron idóneas para este último propósito.

También nos preguntamos si por el contrario, la mezquindad de estas políticas, al ordenar la redención de los censos, sin contemplar sustituto financiero alguno, alimentó el resentimiento contra la Corona y la Iglesia, así como contra la función de esta última en cuanto acreedora del crédito eclesiástico. La voluntad de contraer operaciones de censo -- condicionada por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se hallaba sobradamente ilustrada en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por las Tablas H-II y H-III. Estas Tablas, fundadas a su vez en los apéndices C-I, C-II y C-III nos brindan el número, monto y promedio de los censos y reconocimientos de censos y capellanías, otorgados en Buenos Aires a favor de los diferentes conventos, monasterios, hermandades, cofradías y capellanías. Estos censos montaron, en lo que fue de los siglos XVII y XVIII, hasta 1820, la cantidad de 1.063 operaciones por la suma total de \$1.094.332. Lamentablemente, al igual que con las capellanías, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia de las imposiciones y reconocimientos de censos (crédito

hipotecario) en los mercados inmobiliarios urbano y rural, hasta tanto no hayamos reconstruido totalmente los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando mediante métodos informáticos el universo de las compra-ventas de inmuebles urbanos y rurales.

## **V-VI Los ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.**

Los ciclos comerciales tuvieron su impacto sobre la voluntad de contraer censos. Cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su premio en el canje por moneda corriente o sencilla.<sup>2123</sup> La demanda de moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario, aumentaba. Por el contrario, en tiempos de paz, la afluencia de mercaderías importadas procedentes de África y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor movilidad social del personal dependiente del comercio, la estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. El impacto mencionado se ve ilustrado sobradamente en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por la denominada Tabla H-I. Durante la Guerra de Sucesión de España (1706-12) el mercado de censos (hipotecas) (MH) se cuadruplicó, de un promedio de \$2.000 anuales en el quinquenio 1698-1702 a \$9.000 anuales en el decenio 1703-13. A comienzos de la década de 1760 se registró con motivo de la intervención española en la Guerra de los Siete Años (1762-63) una espiral hipotecaria. En efecto, el número y monto de los censos aumentó de 5 obligaciones a censo por valor de \$4.118 y 3 imposiciones de censo por valor de \$390 en 1761, a 15 y 32 obligaciones a censos por valor de \$17.261 y \$29.135, y 18 y 11 imposiciones de censo por valor de \$18.088 y \$8.540 en 1762 y 1763, respectivamente.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. De todas maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como España se sumó a la misma (1780), el número de censos creció de 6 censos por valor de \$7.068 en 1778 y 11 censos por valor de \$11.050 en 1779, a 21 censos por valor de \$19.096 en 1780. Un lustro más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como consecuencia un mayor incremento del número de censos registrados. Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fue altamente favorable registrándose como reflejo de la misma una prolongada caída del número de censos. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo reflejadas en las estadísticas.<sup>2124</sup> Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando en Buenos Aires el número y monto de los censos se incrementan en forma abismal, de 16 censos por valor de \$16.951 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 censos, por valor de \$26.849, \$48.576, \$45.087 y \$32.620 en 1800, 1801, 1802 y 1803 respectivamente.

También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos aumentan de dos censos por valor de \$1.335 en 1800 a 25 censos por valor de \$77.381 en 1801.<sup>2125</sup> Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron en Buenos Aires drásticamente, de 22 censos por valor de \$32.620 en 1803 a 12 censos por valor de \$16.150 en 1804, 4 censos por valor de \$4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un pico máximo de 20 censos por valor de \$107.053 en 1805 a 13 censos por valor de \$59.414 en 1806, y 5 censos por valor de \$6.287 en 1807.<sup>2126</sup> Luego que la paz con Inglaterra fué sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a Buenos Aires,<sup>2127</sup> el número y monto de los censos registrados en Buenos Aires creció de 4 censos por \$10.000 en 1808 a 7 censos por valor de \$14.940 en 1810. Asimismo Montevideo experimentó similar incremento, por cuanto el número y monto de los censos aumentó de 5 censos por valor de \$6.287 en 1807 a 15 censos por valor de \$29.322 en 1808, 18 censos por valor de \$76.416 en 1809, y 16 censos por valor de \$33.856 en 1810.<sup>2128</sup> De los 181 censos registrados en Montevideo entre 1796 y 1810, 3 lo fueron asegurados sobre quintas, 18 sobre chacras, 9 sobre estancias, y la inmensa mayoría sobre piezas, casas y solares urbanos.

La importancia de Buenos Aires como asiento del crédito eclesiástico está reflejada también parcialmente en la Tabla H-I. Cuando el crédito eclesiástico se estrechaba, la mayor fuente de crédito existente en ese entonces, que no fuera crédito eclesiástico, consistía en los capitales líquidos propiedad de viudas y huérfanos, en manos de vecinos abonados, por lo general grandes comerciantes. Cuando en 1774 y 1775, el crédito eclesiástico se redujo a un mínimo de 7 y 11 operaciones, por montos de \$10.798 y \$16.838 respectivamente, la oferta de dinero a réditos pupilares creció en 1774 a 18 operaciones por valor de \$9.498. En forma semejante, en oportunidad de la implantación de la Real Cédula sobre Consolidación de Vales Reales (1805), en que el crédito eclesiástico se redujo a su mínima expresión, el recurso a los fondos pupilares se incrementó, alcanzando su máxima en 1805, en que se concertaron 31 operaciones por valor de \$101.759.

## **V-VII Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.**

La importancia del crédito eclesiástico estuvo dada también por las numerosas operaciones crediticias concertadas a favor de conventos y monasterios del interior del espacio colonial. Los Monasterios de Monjas Teresas y de Santa Catalina, con sede en Córdoba, eran de los preferidos por los deudores porteños. La Tabla H-III demuestra cómo mientras el Monasterio de Monjas Teresas concertó una treintena de operaciones por valor de \$32.000, el Monasterio de Monjas Catalinas alcanzó a concertar unas cuarenta operaciones por valor de \$97.000. La Tabla H-IV ofrece el listado de los censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII en La Paz. La Tabla H-V ofrece el listado de los cincuenta censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Córdoba. Maeder (1981) nos revela que en Corrientes, entre 1775 y 1810, se contrajeron una veintena de operaciones de censo por valor de \$9.100.<sup>2129</sup>

De los montos promedios de cada censo reflejados en la Tabla H-III surge cómo las diversas ordenes e instituciones eclesiásticas mantenían un patrón de conducta crediticia diversa. Por ejemplo, mientras el Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba prestaba a un promedio de \$2.500 por censo, el mismo Monasterio residente en Buenos Aires prestaba a un promedio de \$1.300 por censo. Asimismo, el Apéndice C-IV nos ofrece la nómina de un centenar de capellanías que otorgaron préstamos a 115 censatarios por valor de \$146.063, a un promedio de \$1.300 por censo. El listado de este centenar de capellanías, demuestra que sólo ocho fundadores de capellanías mantuvieron una relación de parentesco con los censatarios o deudores, lo cual pudo haber morigerado sólo en esos casos los rigores de la cobranza de los réditos. La mayoría de los censatarios, 90 sobre 100, o el 90%, no poseían relación de parentesco alguna con los fundadores de capellanías, aunque sí podrían haberla tenido con el patrono de dichas capellanías. De ese centenar de capellanías citadas en las operaciones de censos, varias de entre ellas no han podido ser halladas.<sup>2130</sup>

Muchas operaciones crediticias eran celebradas bajo la designación de reconocimiento de censo. El Apéndice C-II, que figura como fuente de la Tabla H-III, nos brinda a su vez la mención de 58 reconocimientos de censos otorgados en Buenos Aires por los diferentes conventos y monasterios, que montaron la suma de \$68.733, a un promedio de \$1.200 cada reconocimiento. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de estas operaciones, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos y capellanías eran celebrados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los inmuebles. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles urbanos y 25 sobre bienes inmuebles rurales, los cuales se hallan incluidos en el Apéndice C-III.

## **V-VIII Los deudores de censos y réditos de capellanías.**

Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles urbanos, eran por lo general integrantes de la clase mercantil. Cuando alguno de ellos carecía de bienes inmuebles con que afianzar un adelanto de mercaderías solicitaba de sus colegas las fianzas correspondientes. En otras palabras, como lo afirma Martínez López-Cano (1994), los deudores de censos se veían favorecidos por créditos a largo plazo, por cuanto "...con un desembolso pequeño de dinero en el momento de compra de un inmueble, podían acceder a la propiedad a cambio de reconocer el censo y pagar sus réditos".<sup>2131</sup> El acreedor más exigente en esta materia fue el Convento de Monjas de Santa Catalina. El Alguacil Mayor Silvestre de Zarria y el hacendado Juan Gutiérrez de Paz tomaron prestado de dicho Convento, a comienzos de 1730, la suma de \$1.000 cada uno, y pusieron de fiador al comerciante registrero Francisco de Vieira.<sup>2132</sup> Para la misma época, el registrero Pedro de Lea tomó prestado de dicho Monasterio la suma de \$6.347 y puso de fiador a Juan Martín de Mena.<sup>2133</sup> Y el hacendado del pago de Areco y comerciante en mulas con el Alto Perú José Ruiz de Arellano tomó prestado de dicho Convento en ese mismo período la suma de \$1.000, y puso de fiador al hacendado Fermín de Pessoa, propietario de la rinconada existente en la boca del río las Conchas.<sup>2134</sup> Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles urbanos, eran asimismo fundadores de capellanías. La Tabla G-V revela la intensidad de esta práctica por parte de los mismos deudores de censos. En dicha Tabla figuran las fundaciones de capellanías practicadas por 82 deudores de censos, que sobre un

total de casi un millar de deudores, representaban casi el 10%. Entre ellos figuran grandes comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

## **V-IX Los plazos de redención y renovación de los censos.**

La generalidad de los deudores de la pirámide de censos y capellanías contraídos pugnaban en tiempos de penuria comercial por faltar al cumplimiento de los pagos, o en su defecto, por la prolongación o espera de los plazos de redención y renovación de los censos y por la rebaja de los réditos o corridos. El incumplimiento de los pagos de los réditos procedentes de censos contraídos era también el mecanismo por el cual se castigaba a aquellos párrocos que manipulaban el culto con fines políticos. En Agosto de 1852 el Cura Párroco de San Nicolás Estéban José Moreno, conocido como un fiel amante de la que fuera la Santa Federación, se presentó al Director Provisorio de la República Argentina para protestar del estado escandaloso en que yacían las cinco capellanías de las que se suponía debía servirse su parroquia. En efecto, si bien la primera de estas capellanías, la de misa de alba, instituida para los días semi-festivos, se pagaba escrupulosamente, la misa no se daba o decía.<sup>2135</sup> La segunda capellanía, la de la misa de después de salir el sol, que había sido servida por el finado patrono y capellán Dr. José García López, no se pagaba ni servía, debido a una litis entre su deudo, el Dr. Mariano Gazcón,<sup>2136</sup> y su albacea el Dr. Vicente Anastasio Echevarría.<sup>2137</sup> La tercera y quinta capellanías, de las misas de ocho y doce, tampoco se pagaban, por resistirse a ello su patrona Doña Josefa Peña.<sup>2138</sup> Y la cuarta capellanía, la de misa de diez, que estaba fundada en una casa que fue vendida por su patrono Nicolás Giráldez, se transfirió a una quinta en Quilmes, la cual luego fue concursada por la quiebra de Giráldez.<sup>2139</sup>

## **V-X La oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y renovación de los censos.**

Pero en tiempos de penuria, los Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias) se oponían firmemente a reducir tanto las tasas de interés como los plazos de redención y renovación de los censos, y presionaban por la ejecución y embargo de sus deudores. Tal fué la intensidad de las ejecuciones y embargos producidos, que para 1821, el Provisor Mariano Zavaleta --quien elevara un Informe al Ministro Bernardino Rivadavia acerca de las memorias pías fundadas por las diversas ordenes religiosas-- reveló que el Convento Mercedario ingresó en concepto de alquileres de bienes inmuebles urbanos, obtenidos mediante ejecución, una suma tres veces superior (\$6.956) a la que ingresaba a dicho Convento en concepto de réditos de censos y capellanías.<sup>2140</sup> Para obtener o renovar un censo los potenciales deudores o censatarios debían "...ganar la voluntad de cada uno de los miembros del capítulo de la orden, obtener la recomendación del Obispo, quien a su vez solía sugerir ver primero a los confesores".<sup>2141</sup> El método que se observaba en los monasterios de monjas era semejante. Siempre que había alguien que solicitaba dinero a censo

"...lo pedía a la Prelada, y esta lo consultaba con el Síndico y Madres del Consejo, y si tenía cuenta, se pedía licencia al Prelado, y con ella se entregaba el dinero, de modo que los prelados no tienen que hacer en estos asuntos mas que conceder la licencia o negarla".<sup>2142</sup>

Muchas veces los deudores del crédito eclesiástico estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y Mayordomos de cofradías, hermandades y capellanías, los cuales se negaban a

conceder préstamos o a prolongar plazos de redención o renovación de censos bajo excusas de naturaleza extra-económica.<sup>2143</sup> El azoguero potosino Coronel Juan de Peñarrubia,<sup>2144</sup> confesaba en su testamento que para habilitar el giro de sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como su hija natural, María Enríquez (criada y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso secretamente a librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxilios financieros, obligándolo así a recurrir por vez primera al Banco de San Carlos.<sup>2145</sup>

## **V-XI La base económica de la pirámide financiera eclesiástica.**

La base principal de la pirámide financiera construida por la Iglesia --en Buenos Aires como en la mayoría de las ciudades de la llamada carrera del Perú-- dependía de la suerte de la agricultura y ganadería Rioplatense, de la minería Altoperuana y del consiguiente comercio ultramarino. Pero los bienes inmuebles urbanos y rurales hipotecados en Buenos Aires solo tenían valor en relación con la intensidad del comercio (mular, yerbatero y de mercancías Europeas) existente con el Alto Perú, que la producción minera facilitaba. Una declaración de guerra alimentaba la crisis económica, al disminuir el valor real de las fincas gravadas, sin que mediara deterioro físico alguno de las mismas; y una declaración de paz provocaba el efecto contrario, sin que mediara tampoco mejora física alguna del inmueble.

Por el contrario, el deterioro físico de los inmuebles, urbanos o rurales, iba en desmedro de los alquileres o arrendamientos recaudados, y por consiguiente de los réditos de las capellanías. Para los canonistas Murillo (1765) y Álvarez de Velazco (s/f), seguidos por Febrero Bermúdez (1778), cuando una finca decaía de su antiguo valor, por las circunstancias del país (guerras, pestes, etc.), el perjuicio debía ser para el censatario o deudor y no para el censalista.<sup>2146</sup> En el expediente promovido en Córdoba en 1838 por Restituta Díaz de la Fuente, viuda de Mariano Usandivaras y Allende, contra Fr. Lorenzo de Villada, por la rebaja de los réditos del censo consignativo, que había sido impuesto en su casa por Estanislao Quinteros en 1763, la regla del derecho decía que "La cosa perece y produce por aquel que es Señor", de tal suerte

"...que aunque la finca valiese mucho mas que lo que valía al tiempo que fue censuada, la pensión no podía aumentarse, ni obligársele al censatario que pagase en proporción de lo que había aumentado, por la razón poderosa que las comodidades y perjuicios le pertenecen al censuatario por [ser] Señor de la cosa".<sup>2147</sup>

Luego, del mismo modo, Murillo sostenía que aunque la finca hubiese disminuído su valor no debía pagar en proporción de lo que había decaído de su valor, según aquella regla de derecho que dice "...secundum naturam est incommoda cujusque rei cum sequi; quem sequuntur commoda".<sup>2148</sup> Pero Doña Restituta, para quien la operación no se trataba de un censo consignativo sino de un contrato de compra-venta, insistía que el detrimento que había sufrido la casa no era accidental o temporal sino necesario o permanente. Efectivamente, Doña Restituta sostenía que el valor intrínseco que antiguamente tenían las fincas de su clase estaba

"...enteramente variado en nuestros tiempos, y mucho más desde que naturalmente se va destruyendo con el uso de tantos años, y siguiendo el orden regular de las cosas como la práctica que desde tiempo inmemorial nos enseña, jamás volverán ni aproximadamente al valor que antes tuvieron".<sup>2149</sup>

Habiendo entonces sufrido su casa un demérito tan constante en el tiempo no era aplicable según Doña Restituta la doctrina de Murillo transcrita por Villada, porque Murillo suponía "...una variación de poco tiempo, no inmemorial como se ha demostrado "...ita ut per aliquos annos fundos ille non ferat".<sup>2150</sup> La doctrina que era aplicable según Doña Restituta era la de Salas (1617),<sup>2151</sup> y para Villada la doctrina de Cencio (1621), según las cuales el que las fincas hayan decaído de su valor, es un defecto temporal, que depende de las circunstancias del país, por lo que no deben rebajarse los réditos.<sup>2152</sup> Cecilio Ignacio Ferreyra, apoderado de Villada, argüía que en el censo, a diferencia de la compra-venta, el imponedor o censuario "...permanece siempre en el dominio pleno, y la administración de la casa censuada", y el comprador, acreedor o censalista, "...no tiene más derecho que a percibir la pensión anual hasta que el censo se redime, y lo que se vende no es la finca sino el derecho [a cobrar los réditos]".<sup>2153</sup> En la disputa ocurrida en Buenos Aires, entre la Orden Mercedaria y Petrona Chaparro,<sup>2154</sup> sobre el mejor derecho a una capellanía y oposición a la venta de la casa de Lázaro Quixano, el Procurador del Convento declaraba en 1775 que si bien "...la finca no vale hoy más que lo que consta de la tasación", reconoce que las casas "...tienen hoy mayor valor que antes por estar más introducido el comercio".<sup>2155</sup> Por el contrario, en el caso que --con motivo de la reducción de un censo-- libró en Buenos Aires en 1786 Doña Manuela Yrasusta,<sup>2156</sup> pobre de solemnidad, con el hacendado Juanuario Fernández do Eijo, declaró que habiendo justificado el censuario o deudor haber padecido una lesión en el precio "...tiene acción expédita para hacer que el Censo se reduzca al justo precio".<sup>2157</sup> Para fundamentar su alegato Doña Manuela argüía que si en la compra de un esclavo, que no valía mas de \$200 daba el comprador \$300, el perjuicio experimentado por una vez no era mas que de \$100, y si no lo reclamaba dentro de los cuatro años que previene la ley debía sufrirlo en pena de su omisión; pero en los contratos de censo

"...si para imponerlos se dió una finca regulada a juicio privado y erróneo de los contrayentes en \$2.000, sin que ella valiese en realidad mas que \$1.000; el perjuicio es sucesivo en cada año, y el censuario perjudicado tendría que pagar por \$1.000 de capital imaginario \$50, que en el transcurso de veinte años infieren un perjuicio de otros \$1.000, y en el de cien años sube a \$5.000, que es suficiente para arruinar una familia".<sup>2158</sup>

De igual forma, en los autos que el Síndico del Convento de San Francisco celebró a comienzos del siglo pasado con los herederos de Miguel Pintola y Anastasia Delgado,<sup>2159</sup> sobre el pago del principal (capital) y réditos (intereses) de la escritura censual a que se obligaron tanto la referida, como su yerno Miguel de Ycasate y su hija Sebastiana Pintola, el Dr. José Carrancio alegaba, fundado en la doctrina de Gómez (1552), que para que una mujer casada, obligada de mancomún con su marido, pudiera reclamar de dicha obligación debía pedir relajación o rescisión de contrato, probando haber sufrido lesión enormísima y haber quedado indotada y no tener el marido bienes con que resarcir el perjuicio. Y cuando en 1813, el Dr. Domingo González y Gorostizú,<sup>2160</sup> patrono de la Capellanía fundada por María Eulalia Fustel, dejó de practicar los mantenimientos de la casa gravada, ubicada en el barrio de la Merced, las consecuencias fueron "...en términos de no producirme de alquileres el redicto competente".<sup>2161</sup> Fue entonces que González decidió vender la finca al

Arcediano Andrés Florencio Ramírez "...quien podrá adelantarla y mejorarla dejando siempre reconocido e impuesto sobre ella el principal de la Capellanía".<sup>2162</sup>

La opinión citada de Gómez (1552, 1718),<sup>2163</sup> antagónica a la de Febrero Bermúdez (1778), no era peregrina, porque los más clásicos expositores siguiendo el espíritu de la Ley de Toro opinaban del mismo modo. Gregorio López, entre ellos, tratando de la fianza de la mujer casada decía que "...renunciando el Velisano y la citada Ley y obligándose con juramento prometiendo no oponerse por algún remedio aunque sea de derecho, vale la obligación ¿con cuanto más motivo valdrá si la obligación fue de mancomún?".<sup>2164</sup> Espino de Cáceres (1587, 1592) sostuvo que: "...mulier pro marito vali de fidei pubere potest cum juramento, etiam si non esset certioraa velisari"; que era más y con mayor razón que si se obligara in solidum.<sup>2165</sup> Díez Noguerol (1676) opinaba que "...la mujer por su indotación o por haber sido enormísimamente lesa puede rescindir el contrato".<sup>2166</sup> Zeballos (1613),<sup>2167</sup> al igual que Gutiérrez (1789),<sup>2168</sup> decían que "...el juramento confirma el acto aunque sea nulo, cuando se puede guardar sin perjuicio del alma; pero excluye del acto todo dolo, fraude, miedo y lesión enormísima".<sup>2169</sup> El regalista Salgado de Somoza (1626-27) propuso el caso en el que una mujer casada contrajo con su marido dos obligaciones de mancomún en dos tiempos; en la primera obligación la mitad de sus bienes dotales, y en la segunda la otra mitad. Salgado se preguntaba "...¿si quedando como queda indotada se rescindirán las dos obligaciones?".<sup>2170</sup> Y respondía que la primera obligación no. Y la razón de la no rescisión la designa Castillo (1563), porque el juramento

"...tiene razón de contrato o cuasi contrato y confirma el contrato alias nulo: y no estando prohibido por nuestra legislación de que estos contratos se apoyen con juramento no hay motivo para que se quebrante tan ligeramente, que es el motivo porque Inocencio III prescribe su observancia en el capítulo cum contingat".<sup>2171</sup>

Castillo (1563) y Larrea (1626, 1732) estuvieron conformes en que "...concurriendo en los contratos que celebran las mujeres casadas lesión enormísima, o miedo no reverencial, por que no basta sino un miedo verdadero cum minis, et verberibus".<sup>2172</sup> Y justificado este miedo con la prolijidad que explica dicho Larrea, bastaba para irritar dichos contratos jurados: Y así se explica la santidad del Papa Inocencio III ya citado: Dum modo absit dolus, aut vis. Bonifacio VIII en el capítulo licet mulieris, pone la excepción para la observancia del juramento,

"...de que hayan sido prestados sin miedo y sin violencia y como en las lesiones enormísimas se sospecha dolo, y en las mujeres que así contratan con juramento un miedo que sea bastante para violentar el consentimiento; por eso en el dictamen de los más expositores siempre que concorra violencia para prestarse el juramento y lesión enormísima de que dimana la indotación se irritan estos contratos ope exceptionis".<sup>2173</sup>

Para esta irritación era indispensable según el Protector de las Herederas, Antonio Gómez, "...pedir primero la relajación del juramento ad effectum excipiendi".<sup>2174</sup> Gabriel Pereira tratando el modo como se purga el miedo en los contratos de las mujeres casadas cuando los maridos las engañan o empeñan sus Dotes, según el capítulo adid quod de sponsalibus et regula ratihabitio, cita a Menochio (1605),<sup>2175</sup> a Mascardo (1637), a Padilla (1605), y a Bartolomé Cepolla.<sup>2176</sup> Larrea asimismo decía que "...el miedo se excluye quando el que le padece ratificó el acto meticoloso, y que seguida su observancia se purga el miedo y se

prueba el consentimiento, y ratihabición: Ratihabitionem vetro trahi; et mandato non est dubium comparari".<sup>2177</sup>

## **V-XII La naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.**

En cuanto a la naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, los comerciantes censatarios o deudores solían saldar los réditos adeudados a censos y capellanías con mercancías importadas por ellos con precios también impuestos por ellos, superiores a los precios que solían regir en el mercado de mercancías. En Buenos Aires, el Lic. Pascual de Fuentes,<sup>2178</sup> declaró en su testamento, registrado en 1671, que "...corrí dos años con una capellanía del Cap. Marcos Gutiérrez [de Vargas], y por razón de ella, no he recibido más de tres cuartas de paño de Quito a razón de siete pesos vara".<sup>2179</sup> María Teresa Rendón y Laríz, mujer de Jacinto Aldao,<sup>2180</sup> en los autos con el R.P. Rector de la Compañía, declaraba en 1766 como podría en parte alguna del mundo

"...hacerse efectivo un censo cuyo precio exhibido por el comprador de él, se reducía a pitos y alfileres, millares de abujas, sintas de lana, un almares, un tarro, navajas de barba, gruesas de botones blancos y de serda, gorros, olanes, y bretañas averiadas".<sup>2181</sup>

De haber sido esto común, los acreedores de censos o censualistas no sólo habrían estado impedidos de cobrar intereses usurarios (que probablemente burlaban) y sufrir la imposición de precios monopólicos en la mercadería que recibían como pago por los intereses acreditados, sino que también se habrían visto privados de un metálico con el cual podrían haber accedido al mercado "libre" de mercancías y comprado mercancía importada a precios de competencia. Para cubrirse de estos altos precios, los censualistas o acreedores buscaban cargar sus créditos en inmuebles cuyo valor real fuere superior al de su tasación, o cuya amortización por deterioro físico fuere menor que las expectativas de valorización futura.<sup>2182</sup> Al no cargar con los costos de reposición o mantenimiento de los inmuebles, los censatarios o deudores se veían con el tiempo beneficiados, al disminuir con su deterioro físico el valor real de los inmuebles.<sup>2183</sup>

En la zona más céntrica de Buenos Aires, cercana a la plaza mayor, las casas más valiosas eran las más recargadas con gravámenes contraídos por diversos propietarios en épocas distintas.<sup>2184</sup> Cuando la recarga de los gravámenes excedía el valor real de un inmueble, y su eventual propietario deseaba deshacerse del mismo, hacía el traspaso del dominio sin precio alguno.<sup>2185</sup> La base de la pirámide financiera en el caso de las tierras de estancia y de chacra hipotecadas en el Río de la Plata dependía sólo del precio de las mulas, del cuero y del trigo. Las tierras de estancia hipotecadas solo tenían valor en relación con el valor de las mulas y el cuero producidos en ellas. De igual forma, las tierras de chacra gravadas con censos y capellanías solo tenían valor en relación con el valor del trigo producido en ellas para el mercado interno local.<sup>2186</sup>

Los Cabildos Eclesiásticos y las Ordenes Religiosas, una suerte de clase rentista señorial,<sup>2187</sup> solían mantener en vilo a los deudores de censos y réditos de capellanías. En Cochabamba y La Paz, los Cabildos Eclesiásticos, se opusieron terminantemente a rebajar la tasa de interés alegando que los Cabildos seculares habían padecido engaño en "...suponer destruidas las fincas o haciendas de la provincia con la Sublevación de los Indios".<sup>2188</sup> Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la mayoría de las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los confines

de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para el pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la situación de los censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de sus tierras, el Cabildo Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las pensiones de éstas".<sup>2189</sup> Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía a su lealtad".<sup>2190</sup>

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y piadosas memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o principales impuestos sobre las fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los censos "...se perjudicaría no sólo el censalista, sino también claudicaría la disposición del fundador".<sup>2191</sup> Si un censalista o acreedor instituía una capellanía de \$4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a \$8 cada una, sobre los \$200 de sus réditos, de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo \$120, a razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que quedaba indotada parte de ellas".<sup>2192</sup> Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la Provincia de La Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos perpetuos. No obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba "...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no da mérito a la pretendida reducción de censos".<sup>2193</sup> Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia y deterioro en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no sólo de La Paz, sino también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba no tener noticia de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja que intentan estos hacendados".<sup>2194</sup> El argumento del Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cicales, en que principalmente consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".<sup>2195</sup> Ellos no fueron destruidos porque los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cicales "aprecio y estimación". Aunque algún deterioro sufrieron los cicales por falta de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron quemados los caseríos "...se repararon y repusieron sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó este fruto en los tiempos inmediatos de la sublevación".<sup>2196</sup> Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no poco los hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios de sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus caudales, y quiza de engrosarlos".<sup>2197</sup>

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de Portobello en 1740. Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con motivo del sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los cicales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a una rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "...todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la rebaja de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio

ocasionada por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese por evitar las terribles enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos morosidad y escusación de gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porque si las haciendas perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó igualmente de su estimación, sin que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la reducción de sus pensiones".<sup>2198</sup>

### **V-XIII El tenor de las tasas de interés.**

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi,<sup>2199</sup> consciente del atraso económico del mundo colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber repetido en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había producido en la metrópoli española.<sup>2200</sup> El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales era, en el concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede presentarse a los que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".<sup>2201</sup>

Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la opinión de Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el haber pocos prestadores; y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno de estos dos motivos se verificaba en las colonias, en donde al decir de Villava la masa del dinero es respectivamente [por relativamente] mayor que en España,

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a los frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro por otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del dinero es mayor respectivamente".<sup>2202</sup>

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el comercio era menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la abundancia, y esta proporciona la baratura". Más luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava, por las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".<sup>2203</sup>

En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la agricultura, facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las fábricas y los obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la agricultura exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas [rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuarios [deudores hipotecarios]?"<sup>2204</sup> Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde el siglo XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la Pragmática de Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus roncós alaridos, y abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han determinado la reducción según las circunstancias".<sup>2205</sup>

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época Villava reflexionaba con argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes cuestionan las altas tasas de interés de la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas públicas de la América Latina

"...La rebaja general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, sería útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin ella con las continuas ejecuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas fundaciones de capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".<sup>2206</sup>

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la consistencia de status de los miembros de la elite, que hacía de la longevidad de los patronatos, un instrumento envidiable de prestigio social. Es indudable que dichos prestigios, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la elite y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. Podemos concluir también, que las deudas contraídas por los grandes comerciantes con las instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos, y con las casas monopolistas de Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de interés.<sup>2207</sup> Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector mercantil, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, perjudicando al grupo de comerciantes registreros o monopolistas ligado con las casas comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique,

etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra una de las raíces de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

## **Epílogo Sección I-F**

La expansión mercantil tuvo su necesario derivado en la conformación de la burocracia colonial y en la gestación de los sub-órdenes patrimonial, corporativo y nepótico. Podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso patrimonializador del estado colonial se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.<sup>2208</sup> Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente.

De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa, y elitista por el otro al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra. Finalmente, la Milicia habría participado también fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. Asimismo, ella habría sido la única que logró generar un inusitado proceso de movilidad social ascendente de las capas y grupos marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por la arbitrariedad y el clientelismo. Era entonces natural que de ello derivara un caos más o menos prolongado, que alimentó los resentimientos que precipitaron la revolución de independencia.

## **Sección I-G                      Corporativización de un orden burocrático-regalista**

De manera semejante a las secciones anteriores, donde analizamos los mecanismos de articulación política, social, económica y burocrática de una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista, en esta nueva sección habremos de indagar las relaciones etnológicas de naturaleza político-burocrática, tales como la corporativización de la burocracia respectiva. En efecto, en esta sección, dedicada a investigar los mecanismos corporativos, tratamos en tres capítulos consecutivos la naturaleza de la burocracia colonial, la lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia, y las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia colonialista subordinada (Gobernadores, Virreyes y Oidores)

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de Utrecht (1713), y reforzado el orden imperial-absolutista, a partir de las estrategias

recolonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, entre las cuales descolló la Expulsión de la Compañía de Jesús, se puede concebir un mayor desarrollo de las políticas regalistas y de las tesis ascendentes del gobierno y del derecho, en perjuicio de la independencia relativa del aparato eclesiástico y de las tesis descendentes.<sup>2209</sup> La mayor conflictividad eclesiástica se habría manifestado en los pleitos entre el clero y el Estado, en las desigualdades inherentes a la concesión de patronatos y capellanías; y en la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de órdenes menores, y de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de capellanías, y con el alto clero de origen peninsular. La conducta observada por la corona en el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y la conducta de los Examinadores Sinodales,<sup>2210</sup> y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos,<sup>2211</sup> serían en gran medida responsables de dichos conflictos.

## **Capítulo I-G-24 Naturaleza de la burocracia colonial**

Desde tiempos coloniales se suscitó en la América Latina un debate aún hoy inconcluso acerca de la naturaleza de la burocracia colonial y en especial de la burocracia capitular, así como de los orígenes del régimen federal de gobierno. En los comienzos patrios, políticos y juristas rioplatenses de inspiración Iluminista como Bernardo de Monteagudo, Antonio Sáenz, Tomás Antonio Valle y Pedro Somellera se embarcaron, en medio de la Asamblea del año XIII, en una interminable discusión acerca de la abolición o reforma de los fueros y privilegios corporativos. Si bien con la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 se suprimieron la venalidad, la perpetuidad y la heredabilidad de los cargos concejiles,<sup>2212</sup> se dispuso la renovación de los mismos por elección popular,<sup>2213</sup> y se abolieron los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,<sup>2214</sup> el Tribunal de la Inquisición,<sup>2215</sup> los mayorazgos, y las Reales Audiencias,<sup>2216</sup> los juristas y los políticos como Valentín Gómez, Manuel Antonio Castro, Julián Segundo de Agüero y Bernardino Rivadavia se trenzaron, una década más tarde, en una ardua polémica acerca de la conveniencia o inconveniencia de la reforma o supresión de los cabildos.<sup>2217</sup>

Más luego, continuando la tradición iluminista Rivadaviana, autores como Alberdi (1852,1853) y Sarmiento (1853) manifestaron juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana o absolutista, de raíz renacentista. Tanto De Angelis (1843) primero, como Echeverría (1847), Mitre (1871) y Sarmiento (1866, 1883, 1898) después, fueron modificando este criterio, a la luz de las lecturas de autores impregnados de la tradición romántica (Tocqueville) y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo mediante autoridades puramente militares y sin el paralelo establecimiento de las correspondientes instituciones municipales.<sup>2218</sup> Posteriormente, buscando el origen histórico del proceso emancipador, una corriente de autores influido por el positivismo (Barraquero 1878;<sup>2219</sup> Quesada, 1881; López, 1883; Ramos Mexía, 1887; y González, 1888),<sup>2220</sup> lo encontraron en la naturaleza federalista y autónoma de la estructura corporativa colonial más significativa: la burocracia capitular.<sup>2221</sup>

Pero a fines de siglo, otros autores también influidos por el positivismo,<sup>2222</sup> negaron la relevancia de los cabildos y sostuvieron que en el origen de la emancipación y del federalismo se encontraban el ideario iluminista de la Enciclopedia y las prácticas

modernas, unitarias o centralizadoras Borbónicas, tales como la Expulsión de los Jesuitas (1767), la subdivisión de los Virreinos y su fragmentación en Gobernaciones-Intendencias (1784), la abolición de los Repartos de Mercancías, los Corregimientos y las encomiendas, y la creación de los Tribunales del Consulado de Comercio.<sup>2223</sup> Para estos últimos autores, las prácticas discursivas de las corporaciones colonial-absolutistas pre-Borbónicas (patriarcalismo [mayorazgo], etnocentrismo [limpieza de sangre], nepotismo, clericalismo, señorialismo, corporativismo, patrimonialismo) se oponían al progreso material y a la igualdad jurídica y se resistían a los objetivos reformistas de los Borbones, habiendo sido en realidad instituciones o corporaciones oligárquicas.<sup>2224</sup> Más tarde, liberales de izquierda como Garretón (1933) consideraron que la penetración del capital comercial bajo el débil control de políticas mercantilistas Borbónicas, ayudó a desarrollar un embrión de democracia burguesa y a disolver gradualmente el estado corporativo colonial ("a obedecer pero no a cumplir"). Sin embargo, para autores de la positivista Nueva Escuela Histórica como Heras (1923,1925) y para exponentes de la llamada escuela "revisiónista" como Pereyra (1924), Palacio (1954) y Zorraquín Becú (1958,1959), continuada por Véliz (1984), la legislación centralizadora borbónica (Real Ordenanza de Intendentes y los Tribunales del Consulado), tardíamente impuesta en el Río de la Plata, habría combatido el incipiente federalismo colonial.

También en ese entonces, en los países centrales, se suscitaron profundos debates acerca de la burocracia de la modernidad absolutista.<sup>2225</sup> Autores como Gasser (1939,1946), a mediados de este siglo, probablemente inspirado en Renán, planteaban que la estabilidad de las democracias se fundaba en la mayor o menor antigüedad que poseyera la autonomía de la burocracia municipal (la extensión de sus fueros), con abstracción del carácter oligárquico o democrático de sus elites.<sup>2226</sup> Por el contrario, otros autores, como Bauer (1907) y Luxemburg (1908-09) en la primera pre-guerra; y Kofler (1948, 1974) en la última pos-guerra,<sup>2227</sup> ponían el acento en una burocracia central que hiciera eje en una mayor garantía de las libertades y derechos individuales y, por consiguiente, en una mayor democratización de la sociedad.<sup>2228</sup> Paralela y coincidentemente, en el Río de la Plata, intelectuales de izquierda, como el primer Puiggrós (1940), influenciados por el positivismo francés, asimilaron los cabildos a las comunas feudales, definiéndolas como corporaciones oligárquicas, parodias de los municipios castellanos.<sup>2229</sup> Según Puiggrós (1940), se equivocan quienes como Lisandro de la Torre, piensan que los cabildos nacieron, se desarrollaron y murieron limitados a la esfera económica o administrativa, con prescindencia del carácter del estado y de las transiciones de los antiguos regímenes (feudalismo colonial) al capitalismo.<sup>2230</sup>

Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez, 1961; y McAlister, 1963), influidos por la lectura de Weber (1922), la burocracia colonial española, durante la hegemonía Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación carismática, estamental y patrimonial sino un sistema o balanza de equilibrio entre instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de rituales y fueros o jurisdicciones especiales.<sup>2231</sup> Como el status de los individuos, regidos por criterios de nacimiento, que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961), con el status mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación potencialmente crítica.<sup>2232</sup> Para esa época, Morse (1954), Pike (1958), Phelan (1960),

McAlister (1963), Moreno (1967), y Stein y Stein (1970), hallaron que cada corporación gubernamental de la administración colonial Habsburga, desde el Consejo de Indias hasta la Real Audiencia, los Cabildos y los Corregimientos "combinaban la autoridad judicial y la administrativa".<sup>2233</sup> Esta fragmentación administrativa del poder colonial es lo que habría garantizado un cierto equilibrio. Sin embargo, para otros autores como Higley, Burton y Field (1990) la inestabilidad política y la consiguiente discontinuidad institucional se origina siempre no en la pérdida de las libertades y derechos individuales sino en la frecuente desunión y/o divergencia entre las mismas elites.

La llamada escuela Dependientista,<sup>2234</sup> en una clara reacción anti-Weberiana, preñada de un reduccionismo economicista y fuertemente influida por una interpretación reduccionista del Marxismo, consideró a la burocracia capitular colonial como una burocracia controlada básicamente por el capital comercial metropolitano, el cual en lugar de erosionar los impedimentos socio-políticos y jurídicos para alcanzar el liberalismo, la república y la democracia, y construir un estado burgués independiente, los reforzó.<sup>2235</sup> Sin embargo, para autores como Lynch (1967) y Kaplan (1976), los cabildos exhibieron una gran variabilidad

"...según el grado de poder autónomo,...el tipo de región en que se ubiquen, tareas que deben asumir,...cercanía e intensidad de control de las autoridades reales superiores".<sup>2236</sup>

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido a las necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia aún más patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los señores indianos o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento rentista integrado por censualistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de ingenios de moler metal (usufructuarios de la renta mitaya).<sup>2237</sup> Para algunos de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías oligárquicas fue su naturaleza patrimonialista, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos.<sup>2238</sup> Por el contrario, para otros autores,<sup>2239</sup> lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.<sup>2240</sup> En beneficio de este patriciado o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada voluntad popular,<sup>2241</sup> venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los alcaldes ordinarios, los Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces pedáneos, que no podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia.<sup>2242</sup> Esta restricción en beneficio directo de los clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había logrado mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los electores y los elegidos a un ínfimo núcleo de parientes.<sup>2243</sup>

Teniendo en cuenta que en ese tiempo --a juicio del benedictino Juan de Salazar-- entre los tipos de soberanía real (de las que el rey detentaba sobre sus súbditos) las que se ejercían sobre el entendimiento prevalecían por encima de las que se ejercían sobre el cuerpo y la hacienda,<sup>2244</sup> y que por ende era preciso romper las alianzas de sangre de los patriciados locales, los Borbones se vieron obligados a forzar la participación de los comerciantes peninsulares en la actividad capitular de sus colonias mediante la imposición de la Real Cédula sobre la Alternativa,<sup>2245</sup> y a otorgar una mayor cantidad de dispensas de

ilegitimidad y mezcla de sangres (Informaciones de Limpieza de Sangre, excepciones de calidad, y Gracias al Sacar).<sup>2246</sup> El número de casos sobre nepotismo que llegaron a ventilarse judicialmente fue escandaloso. Sin embargo, como en la mayor parte de los casos los candidatos a cargos capitulares eran impugnados en las sesiones previas de calificación de votos el número de casos de nepotismo registrados judicialmente debe haber sido mucho menor a los que en realidad ocurrieron.<sup>2247</sup>

La prolongación del mandato de los alcaldes,<sup>2248</sup> la derogación de los Corregimientos de Indios, el mecanismo de la alternativa en los Cabildos, la fundación de nuevas ciudades sufragáneas, la imposición de Diputaciones del Real Consulado de Buenos Aires en cada ciudad o distrito, y la designación de Subdelegados de Real Hacienda (con atribuciones en las cuatro ramas de Gobierno, Justicia, Hacienda y Guerra), ordenada por las políticas centralizadoras borbónicas, al despojar a los Cabildos seculares de parte de dichas funciones, limitando sus fueros, habría generado consecuencias letales.<sup>2249</sup> Entre dichas consecuencias, se habrían degradado las ventajas de las elecciones capitulares anuales, congelado la circulación de las elites políticas capitulares, desjerarquizado la justicia capítular, frustrado el creciente localismo que la mayor autonomía relativa de los Cabildos había generado en el pasado Habsburgo, y logrado así abonar el terreno que precipitó los acontecimientos revolucionarios de comienzos del siglo XIX.<sup>2250</sup>

La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares -- conocida como la alternativa-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a visualizar a los peninsulares como poseedores de características étnicas superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa, sumió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa. Pero para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y Brown (1986), la política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no habría afectado a los gobiernos municipales.<sup>2251</sup> Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".<sup>2252</sup> Más aún, para Pereyra (1924), Palacio (1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los intentos de revivir los cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento de las gobernaciones-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una de las más relevantes reformas Borbónicas.<sup>2253</sup> Sin embargo, para Socolow (1987), las reiteradas interrupciones del pago de salarios en la administración pública, luego de la Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó el espíritu de cuerpo de la burocracia colonial.<sup>2254</sup>

Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real asalariada, la burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen Borbónico, y aún probablemente luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la burocracia absolutista.<sup>2255</sup> En efecto, probablemente inspirado en las hipótesis de Jean Jaurés acerca de las consecuencias revolucionarias que en Francia habrían provocado las frustradas reformas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou,<sup>2256</sup> para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios nunca habrían sido definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través de sus sustitutos: los Subdelegados de Real Hacienda.<sup>2257</sup> Los Corregidores de Indios,

funcionarios peninsulares a cargo entre otras funciones de los repartos forzosos de mercaderías en las comunidades indígenas, fueron justamente anatematizados por el ilustrado Virrey Manuel de Amat y Junient como "diptongos de mercaderes y jueces".

La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier, Andrien, Socolow, Peña y Webre,<sup>2258</sup> compuesta por funcionarios que explotaban rentas fiscales y mercantiles (reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar la burocracia colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos o criollos. La subsistencia de la burocracia patrimonial en la América colonial no se hallaba amenazada, según Bonilla (1981), por la burocracia absolutista Borbónica misma, sino por la amenaza que provenía de la propia estructura económico-social colonial criolla.<sup>2259</sup> Asimismo, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron los que más fuertemente insistieron en la inocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la Alternativa) para combatir las oligarquías capitulares.<sup>2260</sup>

Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis sumamente cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendieron los Corregimientos de Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el desfase existente entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo creció también en grado sumo, debido justamente a la depreciación y a la baja del poder adquisitivo del salario.<sup>2261</sup> Y para Parry (1953), el intento de divorciarse del feudalismo y engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer vendibles los oficios concejiles, sino por hacerlos renunciabiles, o en otras palabras heredables, lo cual en lugar de enaltecer el mérito y el esfuerzo personal privilegiaba el linaje, la prosapia y la herencia.<sup>2262</sup> Sin embargo, para Golte (1980), la imposición del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a una clase encomendil, habría significado un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría expresado la frustración de dicho embrión.<sup>2263</sup> Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último, para Choy (1985), desde una perspectiva reduccionista, la venta de los oficios públicos, y entre ellos la de los Corregimientos de Indios, era una hábil política destinada a quebrar la unidad de los burgueses, incorporando a algunos de ellos, incluso a los que padecían del estigma de un dudoso origen racial y una sospechosa legitimidad, como funcionarios del feudalismo; separándolos así de aquellos otros burgueses

"...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función de minar y derribar el sistema feudal por todos los medios".<sup>2264</sup>

La característica más notoria de la modernidad colonial-absolutista Borbónica estaba constituida, según Urbina Reyes (1962), Woodward (1966), Villaseñor Bordes (1970), Meltzer (1978) y Lampros (1980), por las inmunidades forales obtenidas por los comerciantes en los Tribunales de los Consulados de Comercio. Y para Botana (1991), fundado en la obra de V. F. López (1883), la representación capitular en la América hispana no era una representación clásica como en las colonias de la Nueva Inglaterra, sino una representación invertida, donde los cabildantes eran elegidos por los que los precedían en los cargos.<sup>2265</sup> Pero si tomamos en cuenta el impacto del instrumento jurídico, llamado alternativa, debemos reconocer que, a pesar de sus desvirtuaciones, merced a este

instrumento la corporación capitular no era cerrada ni exclusivista, sino abierta, aunque calificada, por cuanto auspiciaba una inclusión controlada. Las fracturas corporativas, aún hoy en día no totalmente extinguidas,<sup>2266</sup> consistían en privilegios judiciales (fueros) que atentaban contra la inamovilidad de los jueces y otorgaban a quienes se integraban a una determinada corporación inmunidad contra el poder jurisdiccional común, habiendo constituido la fuente nutricia de los clericalismos y militarismos en boga.

En una reciente línea de investigación, Vives (1986) sostuvo la hipótesis que las políticas recolonizadoras borbónicas cumplieron en las ciudades una función desestructuradora.<sup>2267</sup> Mientras Domínguez (1985) sostuvo que los patriciados de las distintas ciudades coloniales estaban entre sí jerárquicamente relacionados; Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991) probaron que los patriciados de los asentamientos urbanos más antiguos se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.<sup>2268</sup> Pero en sus análisis, estos autores (Vives, Domínguez, Robinson y Thomas, y Colmenares) no alcanzaron a describir cuales fueron dichas elites ni cuales fueron las formas en que dicha desestructuración y/o jerarquización tuvo lugar.

Por último, aplicando los juicios que formulara Salzmänn (1993) para el Imperio Otomano,<sup>2269</sup> la descentralización de la burocracia colonial que significaron las políticas fiscales privatizadoras (venalidad de los oficios) habría facilitado la transición entre la precoz centralización imperial del absolutismo Habsburgo y la peculiar centralización institucional que introdujeron las Reformas Borbónicas a fines del siglo XVIII.<sup>2270</sup> En forma semejante, la concentración de la burocracia colonial --que significó la lenta gestación de la esfera pública y la consiguiente supresión de la venalidad de los oficios públicos-- habría facilitado la larga transición del orden colonial-absolutista al orden liberal-republicano vigente en el siglo XIX y a la hegemonía de nociones tales como libertad, igualdad, federalismo y constitucionalismo. Últimamente, Fradkin (1987), siguiendo aparentemente las tesis de Phelan, Beneyto y McAlister, sostuvo al referirse al Gremio de Hacendados de Buenos Aires, que el pasaje de gremio corporativo a clase social encontraba en el estado colonial límites que comenzaban a superarse en el estado autocrático, y que sólo se resolvieron en el estado oligárquico, a fines del siglo XIX. Más aún, el autor de este trabajo demostró que la inestabilidad o variabilidad exhibida por la burocracia capitular cambiaba según la naturaleza hereditaria, venal o electiva que prevaleciera entre sus miembros.<sup>2271</sup> En dicho artículo comprobé que los Cabildos seculares, independientemente de los Cabildos Eclesiásticos, las Comandancias de Milicias y los Cabildos Indianos, fueron capaces de competir por el favor político del Rey, el Virrey o la Real Audiencia, así como de prevalecer contra la voluntad de virreyes, gobernadores, comandantes, obispos y oidores poniéndolos a unos contra otros.<sup>2272</sup> De esa forma, sacando ventaja de sus mutuas diferencias respecto de la venta de oficios, solicitud de arbitrios (impuestos) y levas militares, licencias para ausentarse o vender tabaco y naipes, precedencias protocolares, administración de bienes de Temporalidades y nombramiento de autoridades (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Diputados en las Juntas Municipales de Propios y Temporalidades), la burocracia capitular pudo sobrevivir.<sup>2273</sup>

Para estudiar la burocracia secular colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a:

- a) la lucha del comercio y los Tribunales del Consulado con los Cabildos, manifestada en los conflictos producidos por los fueros capitulares, que se expresaban en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción,<sup>2274</sup> y en los actos de honor o representación;<sup>2275</sup>

- b) las impugnaciones de los Alcaldes en ocasión de elecciones concejiles; y
- c) las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores;

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles (Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas últimas y los Cabildos, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este tomo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a la burocracia capitular indagamos los casos en que sus fueros afectaron al comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para estudiar la incidencia de las impugnaciones capitulares hemos realizado algunos cálculos demográficos. Y para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio estudiamos los casos en que el Consulado combatió los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.

## Capítulo I-G-25      **Lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia.**

### Índice

- W-I    Tradición historiográfica en materia de fueros
- W-II   Incidencia de los fueros judicial o capitular.
- W-III   Evasión de los servicios de república: milicia y judicatura.
- W-IV   Incidencia del fuero consular.
- W-V    Exención del pago de la Alcabala.

### **W-I    Tradición historiográfica en materia de fueros**

Si bien los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,<sup>2276</sup> el Tribunal de la Inquisición,<sup>2277</sup> los mayorazgos, las Reales Audiencias,<sup>2278</sup> y la venalidad y perpetuidad de los oficios concejiles,<sup>2279</sup> fueron abolidos por las disposiciones de la Asamblea del año 1813,<sup>2280</sup> y los fueros de la Milicia, la Iglesia, los Cabildos, el Consulado, la Hacienda, el Protomedicato, y el Correo también por las leyes Rivadavianas,<sup>2281</sup> los privilegios corporativos se perpetuaron. Tan se perpetuaron que la Suprema Corte de Justicia Argentina, en repetidos fallos, tuvo que diferenciar los fueros personales, que implicaban una preeminencia social, de los fueros reales, que según Rivarola (1934), y más luego Linares Quintana (1956) y la mayoría de los constitucionalistas contemporáneos, no implicaban preeminencia social alguna. Mientras los primeros fueron suprimidos, los segundos quedaron subsistentes.<sup>2282</sup>

En el caso de los fueros, la mayoría de los estudios sobre los mismos se redujeron a analizar la naturaleza de su origen, en lugar de estudiar los conflictos que por su causa se suscitaron y el desigual impacto que generaron en la estructura social. El derecho a los

fueros militar, eclesiástico, capitular y consular, contaron como verdaderos privilegios personales que --al liberar a sus miembros de las persecuciones de las demás autoridades y atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces y la integridad de las demás corporaciones-- influían en el comportamiento de los mercados de mercancías y de mano de obra afectando, al decir de Max Weber, causalmente las relaciones inter-estamentales e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.<sup>2283</sup> Por ejemplo, si bien los fueros capitular y consular habrían operado en la estructura económica y social en forma restrictiva, en la práctica operaron entre sí en forma antagónica; el fuero capitular, al igual que el fuero eclesiástico, privando al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar créditos; y el fuero consular privando a la burocracia comunal y militar de las inmunidades corporativas. Por el contrario, los fueros militar y eclesiástico habrían dado lugar a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos; y b) privado al mercado de mercancías y al mercado de mano de obra de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. Levaggi (1971) sostuvo que mientras los fueros eclesiástico y militar fueron en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.<sup>2284</sup> El fuero capitular fue restringido aún más, a partir de la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes (1784), al prolongarse el término del mandato de los jueces o alcaldes.<sup>2285</sup> Finalmente, si bien el fuero capitular desapareció con la abolición de los Cabildos,<sup>2286</sup> con las legislaturas provinciales y nacionales apareció el nuevo fuero parlamentario.

En el sentido apuntado por las tesis de Rivarola y Levaggi, cabe entonces preguntarse si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles, y entre estas últimas y los Cabildos, la Milicia y la Iglesia, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a los Cabildos hemos indagado los casos en que el fuero capitular afectó al comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio hemos estudiado los casos en que los Consulados combatieron los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay. A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido una decena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Entre las nociones jurídicas implementadas en el mundo colonial se hallaban aquellas relacionados con las luchas libradas contra el corporativismo, tales como patronato, fuero, recurso de fuerza, avocamiento, declaratoria, e inhibitoria. En estas luchas prevalecían las nociones relacionadas con la facultad de subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales, seculares y eclesiásticos; así como aquellas vinculadas con la facultad de confirmar o revocar la elección de los representantes ante los Cabildos seculares. En lo que hace a la primer facultad mencionada, su origen último residía en el monarca y era delegado por este último en los Virreyes, Gobernadores y Tenientes Asesores Letrados; y en los alcaldes y oidores o tribunales inferiores, respectivamente. De ahí que, en esta concepción regalista del origen de los poderes administrativo y judicial, desarrollada en el siglo XVIII, era lógico y legítimo que el monarca o las autoridades superiores pudieran confirmar o revocar las elecciones concejiles y las ventas de oficios;

subrogar o transferir las facultades del Vice-Patronato Real;<sup>2287</sup> otorgar privilegiadamente el fuero militar o el de nobleza a aquellos a quienes querían proteger de un proceso judicial; interponer contra el fuero eclesiástico el recurso de fuerza,<sup>2288</sup> y avocarse las causas judiciales pendientes o en otras palabras, atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces, dictando a los magistrados inferiores la llamada inhibitoria,<sup>2289</sup> o declinatoria.<sup>2290</sup>

Con anterioridad a la Real Ordenanza de Intendentes, la facultad de confirmar o revocar las elecciones concejiles, recaía en las Reales Audiencias. Sancionada en 1782 la Real Ordenanza, dicha facultad se transfirió a los Gobernadores-Intendentes, quienes la usufructuaron hasta que en 1787 una Real Cédula la anuló, retornándosela al Virrey.<sup>2291</sup> La subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones entre la Iglesia y el estado.<sup>2292</sup> Asimismo, la facultad que poseían los Virreyes, Reales Audiencias y Gobernadores de avocarse las causas judiciales pendientes ante los tribunales inferiores tenía su origen en el derecho canónico,<sup>2293</sup> y consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior.<sup>2294</sup> Por ejemplo, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Campero como la Real Audiencia de Charcas protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias,<sup>2295</sup> u otorgándoles el fuero militar.<sup>2296</sup> En 1737, el Tesorero de la Santa Cruzada Nicolás de Echeverría y Lerchundi, en su pleito con los herederos de Domingo de Acasuso, interpuso por vía de excepción ante el Comisario de la Santa Cruzada la Declinatoria.<sup>2297</sup> En otro conflicto suscitado en 1761 en Potosí entre el porteño Felipe Santiago de Arce, testaferro del poderoso azoguero José Ascasubi, y Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Álvarez Campana, este último se vio obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo "...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama".<sup>2298</sup> En el conflicto suscitado en 1778 en Mendoza entre su Cabildo, dominado por José Perfecto de Salas y las llamadas tres Casas Reinantes, con el Azoguero del Mineral de Uspallata Francisco de Serra y Canals, el Gobernador de Córdoba despachó providencia a Don Agustín Gómez Pacheco, en calidad de juez privativo, "...para que con inhibitoria de todas las Justicias de Mendoza conozca de las causas de José de Almeyda y Juan Santos Preciado, como apoderados de los asuntos de Minas".<sup>2299</sup> En Salta, en la causa criminal que el Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila formara en 1789 contra el Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui, por haberle ofendido e injuriado como Juez Real en una causa por evicción de tierras, el Dr. Domingo Paz y Echeverría, abogado de este último, afirmaba que:

"...si un comprador por ejemplo es reconvenido y demandado ante su Juez Real por otro tercero sobre la cosa comprada, y pretende que el vendedor salga a la voz y defensa; aunque este sea clérigo y goce de un fuero tan privilegiado, debe ir a contestar ante el Juez Real porque la causa de evisión sigue a la principal como la Sombra al Cuerpo".<sup>2300</sup>

Pero habiendo obtenido Saravia la inhibición del Juzgado elegido por el Teniente Asesor, este último alegaba que

"...esta inhibición temporal para sus causas, y las de sus parientes la ha elevado a tan alto grado que intentó hacerla trascendental a otros negocios que no dicen relación, ni con él, ni con toda su prosapia; tales son las causas del público como los arrendamientos de sus rentas y de los abastos de que se trataba".<sup>2301</sup>

Y en Paraguay, en 1796, Don José del Casal y Sanabria obtuvo en la causa criminal que se le formó por la matanza de 75 indios Mbayás, que se le inhibiera de la jurisdicción del Gobernador Lázaro de Rivera, y se le nombrara como Juez privativo de sus causas civiles y criminales al Teniente Gobernador Dr. Gregorio Zamalloa, de sus causas políticas a los Alcaldes ordinarios, y en lo militar al oficial de mayor graduación.<sup>2302</sup> Con posterioridad a la revolución de Independencia estas instituciones de la modernidad absolutista se perpetuaron con ciertos velos o disimulos, como en el caso del Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria,<sup>2303</sup> duramente criticado en 1838 en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,<sup>2304</sup> por Agustín Francisco Wright, así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga.<sup>2305</sup>

## **W-II La incidencia de los fueros judicial o capitular.**

En cuanto a la incidencia que el fuero judicial o capitular pudo haber tenido en la circulación mercantil y en la estratificación y movilidad social entonces vigente, variaba según el tipo de provincia de que se tratara. En las provincias periféricas a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildos fueron por lo general corporaciones representativas de los estamentos productivos y no del comercio, continuamente endeudados con la Real Hacienda. En tanto, en las provincias centrales a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildantes vivían endeudados con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires. Asimismo, como corporaciones, los Cabildos fueron por lo general más restrictivos que la Milicia y los distintos ramos de la Real Hacienda. Entre las prácticas restrictivas más usuales, vigentes en los Cabildos, figuraban la endogamia y la prohibición de recaer la elección en individuos considerados ajenos a la llamada clase decente.<sup>2306</sup> Más aún, para combatir los obstáculos al comercio, las Reformas Borbónicas requirieron que los aspirantes a capitulares poseyeran solvencia, no estuvieran endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran ausentismos, y tuvieran las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.<sup>2307</sup> También es conocido el hecho de que los Alcaldes de primero y segundo voto contaban en tiempos de la colonización Habsburga con casi más poder que los demás funcionarios de la administración colonial. En cambio, los Alcaldes de Hermandad o Jueces Pedáneos operaban como simples auxiliares o delegados de los Alcaldes Ordinarios al actuar en materia penal como jueces de instrucción y en materia civil como jueces de barrio para casos de menor cuantía.<sup>2308</sup> Su incidencia en la estratificación y movilidad social rioplatense estaba directamente vinculada a los mecanismos de reclutamiento implementados, a su grado de subordinación a gobernadores, obispos, oidores y virreyes, y a la composición étnica de sus miembros.

Los miembros de las élites patricias mantuvieron diversas estrategias en su vinculación con los Cabildos. La estrategia más generalizada consistía en apoderarse de los cargos más relevantes para con ellos tratar de manipular las relaciones con el mundo exterior. A los efectos de asegurar el cobro de sus adelantos fiados, los comerciantes acreedores valoraban enormemente las vinculaciones políticas de los deudores. La

circunstancia de ser regidores y apoderados de comerciantes porteños permitía a quienes aunaban dichos privilegios, operar como cobradores de las deudas contraídas por azogueros o comerciantes residentes en el Alto Perú con acreedores radicados en Cádiz o Buenos Aires. Este cobro era particularmente engorroso por cuanto los azogueros contaban con el fuero de minería, el cual los protegía contra todo posible arresto fuera de los centros mineros, y contra toda amenaza de embargo a sus propiedades mineras.<sup>2309</sup> El método más corriente para lograr la seguridad jurídica consistía en imponer en las regiones destinatarias de la mercancía importada las autoridades políticas que compulsivamente podían colocar o repartir dicha mercadería en los volúmenes y a los precios convenientes. El interés por colocar o repartir los embarques de géneros de Castilla o incluso de mercadería ilegal (e.g.: el tabaco vendido fuera del Estanco) llegaba entonces a decidir la suerte política de distritos enteros. La provisión de regidurías, corregimientos y subdelegaciones (con posterioridad éstas últimas a la rebelión tupamara), se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.<sup>2310</sup> También en Potosí, advertido de la postulación a Alcalde del porteño Felipe Santiago de Arce,<sup>2311</sup> testaferro del poderoso azoguero José Ascasubi,<sup>2312</sup> Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Alvarez Campana,<sup>2313</sup> pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entre y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les manifesté, le atrasaban más con dicha elección porqué aún cuando se moderase en los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000 pesos".<sup>2314</sup>

Reyes y Serrano se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo

"...no entendiase en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así como de cajón se mandó librar a mi favor".<sup>2315</sup>

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, porqué "...allí entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".<sup>2316</sup> Sin embargo, la gestión habría logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce dejó el Cabildo para ser designado Contador Interino de la Real Casa de Moneda de Potosí.<sup>2317</sup> Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó al poderdante del Alcalde Arce, José Ascasubi, "...todo lo que había en su casa [a lo] que decía era ajeno".<sup>2318</sup> En vista de dicho descargo, el Juez Comisionario de Lima arrestó a Ascasubi en la Sala Capitular del Cabildo de Potosí, lo que hizo que el Alcalde Arce, metido en la Sala Capitular, armara un tremendo escándalo, escribiendo sus demandas con la ayuda de abogados y escribanos y "...saliendo al balcón de cuando en cuando a dar gritos pidiendo papel sellado".<sup>2319</sup> Para aquietar los ánimos, el Visitador General Jaime San Just,<sup>2320</sup> proveyó un auto ordenando al Alcalde y al Juez Comisionario de Lima diesen parte a la Real Audiencia de Charcas.<sup>2321</sup> En otras palabras, el Visitador General había conminado al Juez Comisionario de Lima y al Cabildo Potosino, pretendiendo antagonizarlos con la Real Audiencia de Charcas. Intimidado el auto, Arce se sosegó, y Reyes pasó a dicha Real Audiencia. Una vez en ella el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, quien debió haber sido Tomás Antonio Álvarez de Acevedo,<sup>2322</sup> pidió se multase al Juez Comisionario de Lima por no haberse asesorado en si los testimonios que Reyes

presentó, como apoderado de Alvarez Campana, le servían o no para arrestar a Ascasubi. Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía votar solo para romper el empate entre los Oidores.<sup>2323</sup> Vista la presentación del Fiscal, la Real Audiencia de Charcas mandó se multase al Juez Comisionario en \$500, y se pusiese a Ascasubi en libertad. Forzados a un arreglo, Ascasubi propuso una composición, por lo que se suspendió la continuación de la causa hasta tanto viniera respuesta de Campana, aprovechando Reyes para retirarse de Charcas rumbo a Potosí. El Juez Comisionado por el Virrey del Perú, que había resultado "atropellado, multado y ajado" por cumplir con su deber, apeló la decisión de la Audiencia de Charcas recurriendo por vía de queja ante el Virrey de Lima, "...pidiendo el que se sirviese ordenar a la Audiencia se le bolviesen sus \$500 y se lo relevase de la Comisión".<sup>2324</sup> Finalmente, Ascasubi rechazó la propuesta hecha por Álvarez Campana, y el Virrey del Perú terminó por solicitar a la Audiencia de Charcas le enviara los autos del caso a Lima. Toda esta parafernalia burocrática muestra el poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas, para resistir las presiones de un Virrey y su correspondiente Real Audiencia, cuando de intereses económicos se trataba.

Así como los azogueros contaban con el fuero de minería, los que pertenecían a la Real Renta de Tabaco y Naipes también gozaban de fueros. En el caso concreto de la Administración dirigida en Córdoba por el Coronel Manuel Castro, pertenecer a la misma significaba gozar de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porque los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".<sup>2325</sup>

Asimismo, en las ferias los proveedores del mercado interno, conocidos como cancheros,<sup>2326</sup> gozaban del llamado fuero de plaza. En Potosí, el llamado fuero de Plaza, "...es como una Aduana donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos comestibles que traen de fuera los mismos labradores o las primeras manos compradoras al tiempo de las cosechas".<sup>2327</sup> Son los miembros del Cabildo potosino quienes nos describen en 1786, el rol cumplido por los cancheros. Estos eran dueños o arrendatarios de "...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por todo el distrito de la Villa".<sup>2328</sup> Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las canchas (unas casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),

"...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo más gravoso a los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris] por los cantos, y allí les quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso que no a podido extinguir el gobierno que se haya dedicado a este objeto".<sup>2329</sup>

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el Dr. Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor),<sup>2330</sup> el Gremio de los Cancheros estancaban en actitud monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de encarecer, y con relación al resto de los productos "...abrían feria a las indias regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". Bien instruidos de la escasez o abundancia de la población, los cancheros

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones, iguales promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella remesa con la seguridad de que cevado el genio ambicioso del indio con esta aparente liberalidad lo buscaría indefectiblemente con todos sus frutos para mantener esta protección que en realidad es una grangería injusta, usuraria y criminal"<sup>2331</sup>

### **W-III La evasión de los servicios de república: milicia y judicatura.**

Otra de las estrategias bastante difundidas en las campañas consistía en instrumentar los cargos capitulares y judiciales para evadir las responsabilidades militares. En Córdoba, el Comandante Félix Mestre,<sup>2332</sup> le comunicaba en 1782 al Virrey Juan José Vértiz y Salcedo que desde que se encargó de las Milicias de Córdoba "...noté los diferentes medios de que se valen en la campaña para escusarse del servicio".<sup>2333</sup> No había, según Mestre "...hacendado que tenga alguna conveniencia, que no piense u anele algún título [juez pedáneo] para ebitar esta incomodidad [servicio de Milicia]".<sup>2334</sup> Por ese motivo, la carga militar venía a recaer casi siempre "...en los más infelices, faltos de auxilios, y por lo mismo sin honor, y sin sentimiento que pueda inspirarle su desempeño".<sup>2335</sup> Entre los títulos de que suelen valerse, Mestre hallaba que el de los Jueces Pedáneos resultaba ser "...uno de los más especiosos, que en tan basta jurisdicción son necesarios para perseguir los ladrones, homicidas, y vagamundos, que lo infestan".<sup>2336</sup> El nombramiento de los Jueces Pedáneos le dictaba a Mestre "...ser un origen fecundo de competencias, y de mutuas quejas, entre dichos jueces y los Oficiales Milicianos".<sup>2337</sup> Los Milicianos denunciaban "...la pensión en que constituyen indevidamente a las Milicias", y los Jueces denunciaban

"...que no se les dan por los Capitanes los auxilios que necesitan, de cuios antecedentes resultan los inconvenientes de estar mal servida la justicia, y la disminución o excepción de muchos individuos útiles para el servicio".<sup>2338</sup>

Entre los auxilios que se solían solicitar a los Comandantes de Milicias estaban los requerimientos de mano de obra forzosa, o Mita agraria, para la siembra y cosecha de granos, y para el poblamiento de las fronteras con el indígena y los portugueses.<sup>2339</sup> Para obviar esta situación de mutua indiferencia, Mestre sugería se adoptase en Córdoba la misma providencia que se había adoptado en Buenos Aires, que consistía en "...autorizar a los Sargentos Mayores y Capitanes de las Compañías para Jueces Pedáneos de sus respectivos Partidos, con facultad de conocer en demandas verbales hasta de \$25".<sup>2340</sup> Quince años más tarde, en 1796, la protesta se invirtió, pues Juan Bautista de Isasi,<sup>2341</sup> quien había sido Alcalde Ordinario de primer voto en 1783, declaraba que el fuero exclusivo de los Milicianos "...no podría menos que turbar y desconcertar la armonía entre los juzgados por las frecuentes dudas y competencias que suelen suscitarse".<sup>2342</sup> Los numerosos mulatos y zambos en quienes recaían los empleos militares, aspiraban a ellos "...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e insolentarse".<sup>2343</sup> Dichos fueros

operaban como privilegios puramente personales, y no como privilegios profesionales o reales, tal como se pretendió aparentar en el siglo XIX. Como era muy reducido y corto el número de vecinos de Córdoba, y muy numerosa la cantidad de cargos de capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, cabos y otros empleos de la milicia a cubrir, Isasi concluía que "...todos vienen a quedar excluidos de la jurisdicción ordinaria, ...por lo menos las dos tercias partes de su vecindario".<sup>2344</sup> También en la Banda Oriental se dieron repetidos conflictos entre los Alcaldes y los Milicianos. En Santo Domingo Soriano, en 1800, el Alcalde de segundo voto Manuel Zavala interpuso queja contra el Capitán de Milicias José Antonio Pérez Tejada, el Alférez Juan Ramos y el Teniente Antonio Velazco, por haberles desconocido jurisdicción para hacerles comparecer a juicio.<sup>2345</sup>

Finalmente, los miembros de los vecindarios, o lo que es lo mismo, de las elites patricias, recurrían a otras instituciones para evadir las responsabilidades de los llamados servicios de república: milicia y judicatura. Entre dichas instituciones resaltaba el rol cumplido por el Correo. En La Rioja, por ejemplo, Francisco Dávila y Doria, que era uno de los vecinos más distinguidos, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones para libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Posta tenían la facultad de elegir al que les pareciera más a propósito para el cargo, sin otro gravamen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca".<sup>2346</sup>

#### **W-IV La incidencia del fuero consular.**

Respecto a la incidencia que el fuero consular pudo haber tenido en la estratificación y movilidad social vigente en el Río de la Plata, es sabido que el Tribunal y las Diputaciones del Real Consulado fueron por lo general --al igual que el Gremio de Azogueros de Potosí y el Gremio de Hacendados de Buenso Aires-- instituciones tanto o más restrictivas que los Cabildos.<sup>2347</sup> Entre las prácticas restrictivas más constantes figuraban la endogamia y la prohibición de recaer las consignaciones en personas no matriculadas en el comercio, incluídos los mancebos, dependientes o mozos de tienda. Ello obedecía, entre otros motivos, a la necesidad de dificultar el contrabando, para lo cual la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos.

En cuanto al fuero consular o mercantil, este hallaba sus mayores obstáculos donde más generalizado se hallaban los fueros militar y eclesiástico. Las contradicciones entre el ejercicio de los fueros militar y eclesiástico y los derechos del Consulado de Comercio provocaron conflictos casi interminables. En Potosí, el Juez Diputado de comercio del Consulado Manuel Fernández de Alonso,<sup>2348</sup> solicitó amparo en 1797 a la Audiencia de Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las autoridades concejiles.<sup>2349</sup> En Oruro, a raíz de que el Diputado del Consulado Fermín José de Ocampo demandara por quiebra al Capitán de Milicias José Cazaos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú resolvió por providencia en 1797 que no gozaban de fuero militar los comerciantes quebrados que pertenecieran a la milicia cívica.<sup>2350</sup> En Buenos Aires, en ocasión del ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794, por la cual se tenían por exentos de ser alistados en los Batallones y Cuerpos de Milicias los comerciantes de Registro, los Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o mancebos, el Comandante de Milicias Miguel de Azcuénaga,<sup>2351</sup> cuñado del Virrey

Olague y Feliú, "...soltó las riendas a su genio orgulloso y dominante; y corrió el velo a la saña de su corazón contra el Español Europeo".<sup>2352</sup> De esa forma, según lo expresa en su memorial de agravios Manuel Crespo, "...se vieron y experimentaron sonrojos, multas y prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados todos a sufrir y callar en aquel Gobierno".<sup>2353</sup> El conflicto subsistió hasta 1799, año en que el Virrey Avilés se expidió eximiendo del servicio a los comerciantes.<sup>2354</sup> Y en Asunción del Paraguay, una ciudad donde los comerciantes con tienda abierta, giro de yerba, y propietarios de barcos para la carrera de navegación del río Paraná, eran también oficiales de Milicias que usufrutuaban del fuero militar, el Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,<sup>2355</sup> planteaba con respecto a la integración de la diputación del Consulado de Comercio, que la prerrogativa del fuero militar

"...les ha hecho creer [a los Milicianos] que en fuerza de las esenciones que gozan de no estar sujetos a las justicias ordinarias, no pueden ser compelidos a aceptar el nombramiento de colegas, cuando esta Diputación los elija, ni a prestar declaraciones o certificados sin que preceda allanamiento de sus personas".<sup>2356</sup>

Cerda consideraba que si bien todo comerciante "...por alguna parte o respecto esté rebestido de otro fuero, siempre se considera sujeto y subordinado a la jurisdicción de los Reales Consulados en negocios mercantiles".<sup>2357</sup> Si para entenderse con tales personas, fuera necesario el allanamiento del fuero en cada ocurrencia, Cerda manifestaba que la jurisdicción

"...sería mendiga, débil, y en cierto modo ninguna la que S.M. por el bien del comercio, y brevedad de las causas ha concedido a estos juzgados privativos y privilegiados que se embarcarían a cada paso en esos trámites y detenciones tan opuestas a su constitución".<sup>2358</sup>

Según este pensamiento, el Miliciano que goza de fuero debería "...pedir licencia para comparecer en la Diputación aún en la calidad de actor en las causas de comercio, sin ser bastante la comparecencia voluntaria, puesto que ninguno puede renunciar el fuero que es de derecho público".<sup>2359</sup> Los Militares que se ingieren y mezclan en negocios y comercios, debían, según Cerda, al igual que los Eclesiásticos, perder el fuero y sujetarse

"...a la jurisdicción que debe conocer de tales causas privativamente con exclusión de las otras, como sucede con los juzgados privilegiados de Bienes de Difuntos y otros, de que no puede declinar persona alguna por privilegiada que sea en las causas que le están peculiarmente cometidas, siendo consiguiente que para su expedición queden allanadas las personas o Bienes que abraza el Ramo en lo extensivo de su jurisdicción".<sup>2360</sup>

Es decir, el Miliciano patentado debería participar

"...de dos fueros privilegiados, uno que lo excluya de las justicias ordinarias en todas sus causas criminales y civiles, y otro que le proporcione la más pronta administración de justicia en las que sean de comercio, sin que un fuero perjudique ni derogue al otro, siendo compatible que el Miliciano patentado esté sujeto a la jurisdicción militar en todas las causas y negocios de su concernencia, y que también lo esté a la del Consulado en las que son propias y privativas de su inspección".<sup>2361</sup>

Si ambos fueros no pueden combinarse, Cerda reflexionaba que en la jurisdicción de los Consulados de las ciudades donde la mayor parte de los comerciantes eran milicianos, como Asunción del Paraguay, se llamarían los más "...al goce del fuero militar, precisando a la Diputación a solicitar el allanamiento de sus personas con retardación de la brevedad en la administración de justicia".<sup>2362</sup> Por ello Cerda concluía, que el Miliciano o persona que goza de fuero "...lo pierde desde el momento que acepta empleo o comisión pública, sugetándose por el mismo hecho a la Jurisdicción que se le confirió".<sup>2363</sup> Sin embargo, pareciera ser que los argumentos de Cerda no prevalecieron, pues en 1796 el Consulado declinó su jurisdicción en el conocimiento de la causa que siguió Luis Casilao contra Antonio Rodríguez;<sup>2364</sup> y en 1808, se privó al Diputado del Consulado de Comercio en la Villa de Concepción Francisco de Quevedo entender en los tratos y contratos que hacían los peones yerbateros con los beneficiadores por ser ellos atribución del Comandante y Juez Político.<sup>2365</sup>

#### **W-V La exención del pago de la Alcabala.**

También el ejercicio de privilegios eclesiásticos, como la exención del pago de la Alcabala, se había constituido en un abuso y una práctica desleal, que si bien atentaba contra los fueros del comercio era, antes de las Reformas Borbónicas, consentida por las autoridades.<sup>2366</sup> El Cabildo de Córdoba se quejaba en 1768 al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos.<sup>2367</sup> Dicho clero se obstinaba en no pagar los derechos de Alcabala so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.<sup>2368</sup> Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo el alcabalero Agustín Garfías,<sup>2369</sup> fue el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfías para detener a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínez, este le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfías, la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".<sup>2370</sup> Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.<sup>2371</sup> En efecto, los apoderados de la testamentaria de Garfías iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales. Este fenómeno también se manifestaba en el litoral. El Cura Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fué al Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo todo a yerba

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas se reduce a cuatro reales".<sup>2372</sup>

Quince años después, en 1736, en nombre del Real Derecho de Alcabala, Gaspar de Bustamante, le inició una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba,<sup>2373</sup> cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires

procedentes del Paraguay.<sup>2374</sup> Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos testimonios incluidos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su Curato", por excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfacción de este y los demás derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar los derechos reales como legos".<sup>2375</sup>

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruiloba provenían de los ingresos que le había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruiloba a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie que le diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruiloba "redujo sus dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.<sup>2376</sup> Por si esto fuera poco, el Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] en Potosí".<sup>2377</sup> Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por \$4.877, otra en 1734 con Francisco Huidobro por \$5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por \$2500.<sup>2378</sup> Posteriormente, con las Reformas Borbónicas (Real Ordenanza de Intendentes), se prohibió a los clérigos el ejercicio del comercio. Pese a ello, la práctica no se abandonó, pues Tjarks (1962) relata la conducta del Pbro. Pedro Ignacio Arze, el mismo que le arrebató sus aguas al Pueblo de Indios de Choya, en Catamarca,<sup>2379</sup> quien en 1808 cargaba gran cantidad de frutos de la tierra en la tropa que Luis Orellana remitía a Buenos Aires.<sup>2380</sup>

Finalmente, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo.

## Capítulo I-G-26      **Contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia subordinada (gobernadores, virreyes y oidores, 1739-1810)**

### Índice

- X-I    Otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades.
- X-II   Poder de una burocracia colonialista subordinada (virreyes, gobernadores, corregidores y oidores).

- X-III Imposición a los cabildos en la elección de autoridades.
- X-IV Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes.
- X-V Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades.

## **Introducción del capítulo I-G-26**

Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas centralizadoras de una burocracia inferior o subordinada (Virreyes, Gobernadores, Corregidores [de españoles], Obispos y Oidores) se intensificara inconscientemente la resistencia de las elites criollas locales, representadas por sus Cabildantes y Comandantes de Armas.<sup>2381</sup> Dichas políticas centralizadoras recaían en la facultad de los Subdelegados de Real Hacienda y de los Gobernadores de:

- a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta;
- b) confirmar elecciones concejiles;
- c) designar autoridades políticas subordinadas;
- d) otorgar fuero militar, y subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales;
- e) conferir rango de capital de provincia así como el de Villa Real, o pueblo de indios;
- f) recaudar impuestos y practicar levas,;
- g) administrar bienes de Temporalidades;
- y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de verbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad política. En ese sentido nos preguntamos si los privilegios estamentales se hallaban o no relacionados con los obstáculos para la formación de una clase política dominante. El pasaje de estamento (patriciado) a clase política encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. En ese sentido hemos indagado el rol jugado por los fueros capitulares en los mecanismos de descentralización de la sociedad colonial y de circulación de las elites políticas, así como los roles cumplidos por el ejercicio de designar Villas Reales y capitales de provincia y Virreinato. También nos preguntamos si los conflictos por los fueros, la autonomía capitular y la independencia de la jurisdicción civil respecto de la militar y la eclesiástica se hallaban o no relacionados con los orígenes del federalismo y el republicanismo. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el rol de los fueros y el margen de autonomía de los patriciados y cabildos locales. En otras palabras, nos proponemos analizar las constelaciones de poderes y privilegios en el espacio ampliado de todo el Virreinato. Por ejemplo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las Villas de Potosí y Tarija. Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Charcas fué afectado en su rango y poder el Cabildo de la Villa de Oruro. Por estar sujetos a la Gobernación-Intendencia de Salta fueron afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Por estar sometidos a la Gobernación-Intendencia de Córdoba fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de La Rioja, San Juan,

Mendoza, San Luis y Río Cuarto. Y por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de Corrientes, Santa Fé y Luján. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), en el Archivo Histórico de Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC). A los efectos de esta investigación nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>2382</sup> así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>2383</sup>

## **X-I El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades.**

El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, las de capital de provincia o Virreinato y las de Villa Real, des-estructuraban la constelación de honores, fueros y privilegios a los que podían tener acceso los pobladores de una ciudad.<sup>2384</sup> En el Alto Perú, en 1781, la Real Audiencia de Charcas vio tremendamente restringida su jurisdicción territorial con la fundación de la Real Audiencia de Buenos Aires.<sup>2385</sup> Más aún, el Cabildo de Charcas, pese a contar con una Real Audiencia en su jurisdicción, se lamentaba que la capital del Virreinato no se trasladara de Buenos Aires a Charcas.<sup>2386</sup> Como capital de una gobernación, una ciudad como Buenos Aires, pasó a ser en oportunidad de las Guerras Guaraníticas (1754-56), sede originaria de la llamada Primera Expedición Demarcadora de Límites; y en oportunidad de la Expulsión de los Jesuitas (1767), capital de las Gobernaciones del Paraguay y Córdoba del Tucumán. Más aún, como capital de Virreinato, Buenos Aires pasaba a ser asiento de toda una administración central, que incluía la Superintendencia de Real Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el Patronato Real, las Temporalidades, la Real Audiencia, el Real Consulado de Comercio, la Aduana, la Administración de Correos, y la Real Renta de Tabaco y Naipes. Una de las consecuencias más inmediatas de la asignación de cabecera de Virreinato fue la ampliación de la oferta de cargos públicos, la redistribución del ingreso fiscal de una ciudad (Potosí) a otra (Buenos Aires), y la redistribución espacial o geográfica bajo su jurisdicción. La ciudad de Córdoba, aún antes de la división de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, ocurrida en 1782, según la respetada opinión del Dr. Victorino Rodríguez,<sup>2387</sup> era considerada por los Cordobeses: capital de la Provincia, "...por residir en ella la Iglesia Católica y por otros establecimientos que tenía [Universidad, Colegio, Administración de Tabaco y Naipes]".<sup>2388</sup> Pero como los Gobernadores residían en Salta, "...por estar así mandado o porque los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas Tenientes, para que en éstos recayere la autoridad del gobierno en su ausencia.<sup>2389</sup> Sin embargo, para los salteños, Salta era entonces "...desde su fundación residencia de los gobernadores, aún estando la Silla Episcopal primero en Santiago del Estero y después en Córdoba".<sup>2390</sup> Más aún, Salta había

"...sugetado por sí al feliz gremio de la Iglesia, y al suave Dominio de Vuestra Real Persona todos los indios que ocupaban este ameno Valle, y toda su lata circunferencia por Norte, Poniente y Sur".<sup>2391</sup>

Con el corto auxilio que le dio la Ciudad de Jujuy, su colonia o ciudad sufragánea o subordinada, Salta

"...ha extendido la frontera del Chaco más de 80 leguas por el NNE, donde se ha fundado la Nueva Ciudad de Orán,...ha dilatado su frontera por el NE más de 60 leguas estableciendo allí fuertes y Fortines, que hacen barrera a los indios

infieles,...ha unido por el Este su frontera con la de Santiago del Estero, de manera que la una y la otra resguardan completamente al Tucumán, que ha contribuido muy poco a estas glorias".<sup>2392</sup>

De ahí que el Cabildo de Salta,<sup>2393</sup> se hubiera quejado en 1807 de la traición de su Teniente Asesor Letrado José de Medeyros,<sup>2394</sup> quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado. Para los capitulares salteños no era de admirar que Tucumán aspirara

"...al rango de Capital de Provincia, porqué apenas habrá en el Mundo una [ciudad] que no quiera ser metrópoli, pero admiramos que no conozca, y no confiese, que todavía no ha llegado su vez".<sup>2395</sup>

Pero para estos capitulares salteños esta "vez" u oportunidad no se había dado aún porqué

"...ni su situación geográfica, ni su población, ni sus circunstancias, ni sus servicios, son comparables con los de esta ciudad de Salta, que se halla en el centro del nuevo Gobierno, y del nuevo Obispado, dividido del de Córdoba".<sup>2396</sup>

Cuando finalmente, durante las Reformas Borbónicas, las grandes jurisdicciones de tiempos de los Austrias dieron lugar a nuevas jurisdicciones, las grandes ciudades entraron a disputarse los territorios limítrofes. Cuando se dividieron las Gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba del Tucumán, ciudades como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero pasaron a depender de la Gobernación de Salta del Tucumán y ciudades como La Rioja de la Gobernación de Córdoba. Pueblos más pequeñas, como Cruz Alta o Guardia de la Esquina, eran disputadas en 1775 por las jurisdicciones de ciudades mayores, como Córdoba y Buenos Aires.<sup>2397</sup> En la rebelión comunera de Traslasierra ocurrida en 1774 –a semejanza de la acontecida en Corrientes en 1764-- Cipriano Hurtado de Lara habría fraguado un documento por el cual el Cabildo puntano veía con buenos ojos que el partido de Traslasierra, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, se pasara a la jurisdicción Puntana.<sup>2398</sup> En 1784, el Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo decide dividir los cinco Departamentos en que estaban comprendidos los treinta pueblos de Misiones. Los Departamentos de Yapeyú, San Miguel y Concepción pasaron a depender de la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires, y los Departamentos de Candelaria y Santiago de la Gobernación-Intendencia del Paraguay.<sup>2399</sup> Seis años antes, en 1778, el Virrey Vértiz había repartido también el territorio de Entre Ríos, adjudicando a Buenos Aires la llamada Costa del Uruguay, desde el río Nogoyá hasta el río Uruguay, incluyendo los partidos de Gualaguay, Gualaguaychú y Arroyo de la China; y a Santa Fé la llamada Costa del Paraná, que abarcaba la zona entre los ríos Paraná y Nogoyá.<sup>2400</sup> Pero pese a este nuevo redimensionamiento de las jurisdicciones, los vecinos de la aldea de Nogoyá alegaban a fines del siglo XVIII, no estar ésta sometida a la ciudad de Santa Fé.<sup>2401</sup> En un largo escrito, elevado en 1789 al Gobernador de Buenos Aires, los vecinos de Santa Fé José Arias Troncoso,<sup>2402</sup> José de Vera Múxica,<sup>2403</sup> y José Manuel Troncoso,<sup>2404</sup> integrantes de la facción dominante de los Echagüe, los Maciel y los Vera, aducían que en su ciudad se debía tener a Francisco J. Crespo,<sup>2405</sup> nacido en Santa Fé, por más foráneo que José Ignacio Uriarte,<sup>2406</sup> pues Crespo

"...es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuia parte se ha pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en los jueces de aquí [Santa Fé], jurisdicción ni autoridad".<sup>2407</sup>

Recién en 1792, la región de Nogoyá, que del punto de vista administrativo dependía del Alcalde de Paraná, subordinada a su turno al Cabildo de Santa Fé, designa para el cargo de Juez Pedáneo a Santiago Hereñú,<sup>2408</sup> vecino y hacendado de dicho partido.<sup>2409</sup> De igual manera, ciudades tenidas por principales o mayores, donde regían las restricciones de raza y linaje para acceder a la condición de don y de vecino, se oponían a que se les otorgara privilegios, prerrogativas o fueros a pueblos considerados menores en jerarquía, por estar poblados por blancos pobres y de dudosa legitimidad de origen, mestizos y mulatos libres, donde no regían las anteriores restricciones. Cuando en 1755 el Gobernador José de Andonaegui concede al pueblo de Luján la condición de Villa, por su rol militar en la defensa de la frontera, el Cabildo de Buenos Aires puso en duda por muchos años la autoridad del Gobernador para conferir tales privilegios, cuestionando numerosas veces la designación de Alcaldes de Hermandad hecha por el Cabildo de Luján.<sup>2410</sup> En localidades menores, como Traslasierra, provincia de Córdoba, sus vecinos se alzaron en 1774 contra la prepotencia de su capital, bajo la dirección de su Cura Párroco el Dr. Simón Tadeo Funes, y reprimidos por el Maestre de Campo Juan Tiburcio Ordóñez.<sup>2411</sup> Más luego, el Gobernador-Intendente de Salta Ramón García de León y Pizarro y el Gobernador-Intendente de Córdoba Marqués Rafael de Sobremonte, instados a atraer población, por la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras frente al peligro indígena, le otorgaron la condición de Villa a numerosos pueblos, entre los cuales destacamos a San Carlos en Mendoza,<sup>2412</sup> Nueva Orán en Salta,<sup>2413</sup> y Río Cuarto y La Carlota en el sur de Córdoba.<sup>2414</sup> De igual modo, los Gobernadores del Paraguay le otorgaron categoría de villa y le asignaron Cabildo a los pueblos de Belén, Concepción, Curuguaty y Neembucú.<sup>2415</sup> Cuando a fines del siglo XVIII el Cabildo de Montevideo demandó formar un Consulado de Comercio propio, el Síndico Procurador del Cabildo de Buenos Aires Francisco Antonio de Escalada,<sup>2416</sup> opuesto al proyecto, manifestó que hasta ese momento Montevideo "...no ha salido, ni es justo que salga de la clase de [ciudad] subalterna y subordinada".<sup>2417</sup> En 1780 se dispuso

"...que las familias dispersas situadas en parajes arriesgados y generalmente todos los habitantes de la campaña que no tuvieran terrenos propios [es decir aquellos que no fueren de la condición de vecinos], los agregados a las estancias o chacras y los vagos sin residencia fija se reuniesen a los respectivos Fuertes o Guardias".<sup>2418</sup>

Y, finalmente, en momentos en que el gabinete español se disponía a sobornar al Cabildo de Buenos Aires entregándole títulos de "fiel y leal", fue cuando tomó conocimiento de la revolución.<sup>2419</sup>

## **X-II El poder de una burocracia colonialista subordinada (Virreyes, Gobernadores, Corregidores y Oidores).**

A diferencia de la colonización británica, en la colonización española las reales audiencias y los cabildos carecían de autonomía legislativa.<sup>2420</sup> El poder de Oidores, Virreyes, Gobernadores y Corregidores (de Españoles), correspondía al de una burocracia colonialista inferior y subordinada a la metrópoli colonial, esta última la única que podía legislar. La condición de inferior respecto de una burocracia metropolitana de un estado superior es algo que se descuenta, como lo era la condición de superior del estado monárquico español.<sup>2421</sup> Dicha burocracia subordinada siempre tuvo a su vez la facultad de transferir el poder jurisdiccional que detentaba. La interferencia de autoridades aún más subordinadas, tales como los Tenientes de Rey,<sup>2422</sup> los Comandantes de Armas, los

Tenientes Asesores Letrados y los Subdelegados de Real Hacienda, en las decisiones jurisdiccionales o administrativas capitulares (Alcaldes Provinciales, Alcaldes de Hermandad y de Barrio) dio lugar a disputas de toda índole. En teoría, la facultad de confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por Virreyes, Presidentes de Reales Audiencias, Gobernadores y Corregidores (de Españoles). La Real Ordenanza de Intendentes, sancionada en 1782, transfirió la facultad virreinal de confirmar las elecciones concejiles a los Gobernadores-Intendentes, quienes usufructuaron dicho privilegio hasta que en 1787 una Real Cédula anuló dicha transferencia retornándosela al Virrey.<sup>2423</sup> Pero en la práctica, esta facultad la usufructuaban los Tenientes de Rey, los Justicias Mayores, los Alcaldes Provinciales y, más luego, los Subdelegados de Real Hacienda.<sup>2424</sup>

Respecto de la facultad de nombrar o rechazar autoridades políticas, los Cabildos seculares manifestaban sus celos respecto de los Tenientes Asesores Letrados, de los Corregidores (de Españoles), de los Alcaldes Provinciales, de los Alcaldes de Barrio, de los Gobernadores-Intendentes, de los Virreyes, y hasta del propio Rey. En Buenos Aires, cuando en 1778 Carlos III reemplazó a Pedro Antonio de Ceballos por Juan José de Vértiz y Salcedo, su Cabildo se "afligió" implorando que Ceballos quedara en el cargo. De resultas de esta impertinencia, el Rey confinó por un año en las Malvinas a los cabildantes Judas José de Salas y Bernardo Sancho Larrea, y a los otros nueve capitulares que firmaron la representación se les prohibió ejercer cargos concejiles durante siete años.<sup>2425</sup> A los efectos de tomar conciencia de la influencia de los cabildantes porteños castigados por el Rey, el Apéndice A-I nos ilustra acerca de las conexiones que dichos capitulares mantuvieron con el interior del espacio colonial. Diez años después, en 1788, cuando el Super-Intendente de Real Hacienda Francisco de Paula Sanz rechazó las elecciones capitulares, que habían recaído en Manuel Antonio Warnes,<sup>2426</sup> por el "espíritu revoltoso" del elegido, el Cabildo apeló a la Real Audiencia, y esta alta magistratura confirmó a Warnes en su nuevo cargo, desairando a Sanz, quien optó por aceptar el cargo de Gobernador-Intendente en el Alto Perú.<sup>2427</sup> Y a fines de siglo, en 1799, cuando el Virrey nombró al Caballero de Santiago Capitán de Navío Martín Boneo,<sup>2428</sup> como Intendente de Policía, subordinado al Virrey y encargado del registro y nomenclatura de calles, el Cabildo lo rechazó apelando a Madrid con éxito.<sup>2429</sup> Estas arbitrariedades también se registraron en otras provincias. En la propia Córdoba, en 1784, el cabildante Miguel de Learte y Ladrón de Zegama confesaba que

"...lo que más me dio que sentir fue el de haber de hacer frente al Teniente Asesor, al Gobernador y al mismo Cabildo, porque la Ciudad gozase de la libertad establecida y los Alcaldes, de la que debían gozar en no estar sujetos a los Gobernadores, por apelación que se habían abrogado".<sup>2430</sup>

Veinte años más tarde, en 1806, el Gobernador-Intendente Interino de Córdoba Dr. Victorino Rodríguez rechazó la elección de José Francisco Tissera como Alcalde Ordinario de Río Cuarto "...porqué poseía un estanco de tabacos que sufriría la falta de atención, en detrimento de las rentas reales".<sup>2431</sup> En Paraguay, uno de los motivos que engendró una poesía de fuerte raigambre popular consistió en el repudio que la corrupción de los altos funcionarios públicos, provenientes por lo general de Buenos Aires, provocaban en la población, en especial la corrupción originada con el secuestro de las propiedades jesuíticas. Entre los gobernadores designados para imponer el Ramo de las Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires Agustín Fernando de Pinedo,<sup>2432</sup> manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría

encomenderos,<sup>2433</sup> por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.<sup>2434</sup> Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien denunciara en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.<sup>2435</sup> A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos logrado rescatar del olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de Concepción Ayudante de Milicias Manuel García de Barrazábal-- siete de esas "décimas" y algunos estribillos. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en los parajes públicos de Asunción por un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las mismas. El texto de Vallejos es estudiado en el tomo siguiente.

Posteriormente, el Gobernador Lázaro de Rivera,<sup>2436</sup> profundamente enemistado con el Virrey Marqués de Avilés, había despojado de su alcaldía a Don José del Casal y Sanabria,<sup>2437</sup> el anfitrión y amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal.<sup>2438</sup>

### **X-III La imposición a los Cabildos en la elección de autoridades.**

Las Reales Audiencias y los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra solían también imponer a los Cabildos la elección de diversas autoridades políticas. Acevedo (1972) nos ilustra con el caso que se dio en Córdoba, en 1757, donde el abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco, designado como Comisionado en Córdoba por el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte,<sup>2439</sup> procesó a los capitulares Gerónimo Luis,<sup>2440</sup> Juan Agustín,<sup>2441</sup> y José Gregorio Echenique,<sup>2442</sup> Félix Cabrera,<sup>2443</sup> Gregorio Arrascaeta,<sup>2444</sup> José Arrascaeta,<sup>2445</sup> Marcos Ascasubi,<sup>2446</sup> y José de Molina Navarrete,<sup>2447</sup> por haber levantado en 1756 cargos no justificados contra el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>2448</sup> quien por otro lado se hallaba apoyado por un numeroso grupo de partidarios.<sup>2449</sup> De resultados de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.<sup>2450</sup> Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilleto,<sup>2451</sup> y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,<sup>2452</sup> Manuel de Castro,<sup>2453</sup> y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique,<sup>2454</sup> por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilleto fue suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.<sup>2455</sup> Asimismo, Acevedo (1965) nos ilustra con el caso que se dio a fines de siglo en Santiago del Estero, donde el Subdelegado Juan José Iramain,<sup>2456</sup> fue acusado de ser "...el principal motor de tomar cartas en las elecciones [concejiles] de bastantes años a esta parte".<sup>2457</sup> Iramain, era a juicio de José Bravo de Rueda,<sup>2458</sup> en una acusación elevada en 1789, un personaje

"...que se sujeta al coecho de maior entidad que solo para esto no tiene los sentidos perdidos de modo que ya no hay valor el sufrirle sus vorracheras continuándolos asta en los actos más serios de Cabildo y aún en estas presentes elecciones, causando gravísimos escándalos introduciéndose a las tavernas o pulperías, de vara alta y Peluca, a proveerse de aguardiente y proveer una botella para venir con ella a las actas capitulares, en donde por instantes saliendo a sus

corredores, a vista del Pueblo saciaba su apetito con brindis a su Teniente [Gobernador], y a la amanuense Escribano".<sup>2459</sup>

Al año siguiente, en 1790, y seguramente como consecuencia de la acusación de Bravo de Rueda, el Gobernador-Intendente de Salta anuló la elección de Iramain como Alcalde de segundo voto, porque ya era Subdelegado de Real Hacienda y, como tal, excluido de cargos capitulares.<sup>2460</sup>

#### **X-IV El caso de la inhibitoria.**

Los conflictos sobre la designación de los Jueces Pedáneos o de Hermandad y los Alcaldes de Barrio es lo que más nos ilustra acerca de la arbitrariedad con que el régimen absolutista administraba justicia. Cuando algún Alcalde pretendía dictar medidas que no le simpatizaban a los Gobernadores y Comandantes de Frontera o juzgaba por sí mismo las acciones de algún funcionario de alto rango les caía por lo general la inhibitoria,<sup>2461</sup> institución que consistía en avocar las causas pendientes o, en otras palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior. A comienzos del siglo XVII, en 1608, con motivo del recurso que el Procurador del Cabildo de Tucumán interpuso ante la Real Audiencia de La Plata se declaró "...que los Gobernadores no quiten las Causas Civiles, ni criminales de los Jueces Ordinarios hasta que las vean, sentencien, y determinen, ni después de sentenciadas".<sup>2462</sup> Un siglo más tarde, en 1721, con motivo de una Provisión dictada por la Real Audiencia de La Plata, la cual avocaba las causas judiciales de la jurisdicción de Tucumán, el Gobernador Estéban de Urizar y Arespacochaga representó el perjuicio que experimentarían los Tucumanos "...si se pusiese en práctica lo prevenido por la Real Audiencia".<sup>2463</sup> Atendiendo el reclamo, el monarca "...se dignó prevenir a la misma Real Audiencia, se ajustase a la disposición de las ya citadas Leyes, que con otras alegó el expresado Gobernador, y se corroboran por la Real Cédula de 30 de Mayo de 1721".<sup>2464</sup> Otro medio siglo más tarde, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>2465</sup> como la Real Audiencia de Charcas, protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias.<sup>2466</sup> Si bien el poder judicial como el militar trataban de guardar entre sí una mutua independencia, la violación de este *modus operandi* fué una constante. En Aunción, en 1794, el Gobernador Intendente Joaquín de Alós representó ante el Virrey el deshonor e ignominia que se le seguía de habersele inhibido de todo acto jurisdiccional con respecto a los Capitulares que informaron contra su conducta.<sup>2467</sup> El separarlo de todo acto jurisdiccional, era para Alós, "...suponerme reo, o delincuente, o que hay al menos semi-plena prueba para temer alguna violencia y estorción de que estoy muy distante como lo he protestado repetidas veces a VE. y lo acredita la experiencia".<sup>2468</sup> El poco concepto que se haría de mis Providencias, alegaba Alós,

"...y el ningún respecto y subordinación con que se me ha de mirar hace más sensible dicha inhibición porque con este motivo hirán tomando ..ansa considerándose independientes de mi jurisdicción: con este mal ejemplo otros pocos reflexivos y naturalmente inquietos se animarán a buscar ocasiones de probar mi paciencia, pues todo es de presumir sin hacer una violenta conjetura".<sup>2469</sup>

Tan extendida estaba esta institución de la inhibitoria que incluso era cantada por el pueblo en las décimas de protesta. El Alcalde José Marcos Vallejos en su disputa contra el Gobernador Pinedo, arriba detallada, reproduce unas décimas entre las cuales se reclama de Pinedo que les dé la inhibitoria para recurrir ante el Rey.<sup>2470</sup> En San Juan, el Alcalde de

segundo voto José Cano de Carvajal, depuso en 1803 de su cargo de Alcalde de Barrio a Tadeo Rojo, degradándolo "...hasta el extremo, creyéndose que ha cometido algún crimen que lo ha hecho digno de esta deposición".<sup>2471</sup> En San Luis, el Procurador Juan de Almeyra, a nombre del Alcalde Provincial José Ramírez de Villalón, (a) "El Lechero", enemistado con el Alcalde de Primer Voto Marcelino Poblet,<sup>2472</sup> alegaba que sus facultades para designar cuadrilleros se hallaba coartada. Ello ocurría, según Villalón, contra lo que dictaba la tradición, por cuanto el Cabildo "...por legítima costumbre o por Real Cédula expedida al intento se halla en la posesión de nombrar Alcaldes pedáneos o de la hermandad que están repartidos en su jurisdicción", cuando en San Luis "...no hay semejante costumbre ni aquella Real Cédula debe extenderse a ella".<sup>2473</sup> En la propia Buenos Aires, cuando para suplir la insuficiencia de las medidas tomadas por los Alcaldes Ordinarios, los Cabildos estimulaban con premios la prisión de los salteadores, Mariano Moreno concluyó en 1810 que los Cabildos "...no tienen autoridad para ofrecer premios, ni tomar una intervención activa en las prisiones de los delincuentes, cuías causas penden ante los Juzgados Ordinarios".<sup>2474</sup> En la Villa de Luján, cuando en 1755 carecía aún de Cabildo, la jurisdicción ordinaria era ejercida por el Cura Párroco del lugar.<sup>2475</sup> Y en Ranchos y Chascomús, jurisdicciones fronterizas de la provincia de Buenos Aires que se regían con la sólo autoridad militar de sus respectivos Comandantes, cuando a comienzos del siglo XIX el Cabildo de Buenos Aires les designó Teniente Alcalde y Alcalde de Hermandad, dicho Cabildo tuvo que acudir en defensa de los mismos contra las resistencias de sus Comandantes.<sup>2476</sup>

#### **X-V Las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades.**

En cuanto a la designación del Diputado a las Juntas Municipales de Temporalidades, órgano encargado de subastar los cuantiosos bienes de los Jesuitas Expulsos, esta facultad dió lugar a una gran confusión entre las autoridades gubernativas y las capitulares. En Mendoza, en 1771, el Gobernador Vértiz designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.<sup>2477</sup> Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco Correas,<sup>2478</sup> el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales Reales Juan de Gamboa,<sup>2479</sup> y el Procurador General Francisco Javier Santander.<sup>2480</sup> En Santa Fé, el cargo de Depositario de los bienes de los Jesuitas expulsos había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín Maciel,<sup>2481</sup> quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas [de los biens Jesuíticos] sin dar cuenta detallada alguna".<sup>2482</sup>

Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Muxica reproducían la misma conducta que en períodos anteriores había desplegado la familia de los Monje. En Tucumán, la designación de Defensor de Temporalidades, recaída en 1768 en el Fiel Ejecutor Propietario Diego Ignacio Aráoz del Campo,<sup>2483</sup> vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de Figueroa,<sup>2484</sup> llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en 1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre) entre 1771 y 1775; su otro hijo Diego Miguel Aráoz fué Cura Vicario de Monteros; y el primo hermano de estos últimos Miguel Aráoz y Echávez,<sup>2485</sup> alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772. Sin embargo, la unión de este clan familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego Ignacio Aráoz, sus hijos Pedro

Antonio y Diego Miguel disputaron arduamente su herencia.<sup>2486</sup> En 1770 fué designado Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades Miguel Aráoz, y en segundo lugar Vicente Escobar y Envila.<sup>2487</sup> Esta designación no fué bien recibida por el Cabildo pues en dicha oportunidad dividió sus preferencias.<sup>2488</sup> Mientras el Alcalde de Segundo Voto Vicente Escobar, el Alferez Real Simón Domínguez,<sup>2489</sup> y el Alguacil Mayor Francisco Texerina y Barreda,<sup>2490</sup> la repugnaron, el Alcalde de primer voto Luis José Díaz de la Peña,<sup>2491</sup> el Alcalde Provincial Francisco Xavier Sánchez de la Madrid,<sup>2492</sup> y el Regidor Decano Juan Porcelo y Zuaso,<sup>2493</sup> la votaron; desempatando el Gobernador en favor de Aráoz. Luego, en Diciembre de 1771 habiendo sucedido Escobar a Aráoz, el Cabildo le reportó al Gobernador de Buenos Aires Vértiz, en el afán de incriminarlo, que Escobar condujo a una hacienda de las Temporalidades

"...toda su crecida familia donde se mantiene hasta la fecha, teniendo en su poder las llaves todas de la casa, y de quanto ay en ella, disponiendo de todo a su arbitrio, y gastando de las Temporalidades".<sup>2494</sup>

Un año más tarde, en mayo de 1773, Sánchez de Madrid le informaba a Vértiz que la conducta de Escobar "...me ha parecido siempre mala, [pues] ha cometido en ella muy graves excesos".<sup>2495</sup> En su reemplazo recomienda en primer lugar al Tesorero de la Real Hacienda José de Thames,<sup>2496</sup> y en segundo lugar a José de Molina.<sup>2497</sup> Finalmente, la Junta de Temporalidades del Tucumán lo remueve a Escobar de la Presidencia,<sup>2498</sup> y nombra en su lugar, en Octubre de 1773, al Administrador de Correos Fermín Ruiz Poyo.<sup>2499</sup> En cuanto a la Administración de Correos, órgano encargado de la administración de las postas y de la distribución de la correspondencia de ultramar, también gozaba de fueros propios.<sup>2500</sup>

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,<sup>2501</sup> y quienes dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.<sup>2502</sup>

## **Epílogo Sección I-G**

En cuanto al Real Consulado de Comercio, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente

entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,<sup>2503</sup> y quienes dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.<sup>2504</sup>

## **Sección I-H            Nepotización de un orden colonial-absolutista**

De la misma forma que en las secciones anteriores hemos estudiado la crisis, la sociedad, la economía y el aparato burocrático del mundo colonial, en esta nueva sección pondremos el foco de nuestro interés en la conformación de las relaciones etnológicas de naturaleza demográfica, tales como las redes de parentesco en el seno del poder político colonial. En esta sección, dedicada a investigar la nepotización del orden imperial-absolutista, trato en tres capítulos consecutivos el análisis del etno-centrismo capitular en las ciudades carentes de inmigración, la inmigración de comerciantes peninsulares y la exogamia en los cabildos, y las cuotas exógenas o endógenas de representación política (la Alternativa en las recusaciones capitulares).

Para autores como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979) y Pietschmann (1992), quienes estudian la elite de la ciudad de México; Casaús Arzú (1992), quien estudia las elites Centroamericanas; y para Martínez Ortega (1989) y González Muñoz (1990), quienes analizan la elite Yucateca, lo que determinaba que la burocracia estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.<sup>2505</sup>

### **Capítulo I-H-27            Etno-centrismo capitular en ciudades carentes de inmigración.**

#### **Índice**

- Y-I    Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.
- Y-II   Prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.
- Y-III   Hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.

#### **Introducción del capítulo I-H-27**

En principio, la presencia del patriciado varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Dicho ranking fue elaborado sobre la base de la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total

de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, encabeza el ranking de posiciones Santiago del Estero con el 40,25%, seguido por La Rioja con el 37,30%, Tucumán con el 33,16%, Córdoba con el 20,23%, Jujuy con el 19,56%, Salta con el 17,33% y Catamarca con el 14%.<sup>2506</sup> Lamentablemente no contamos con cifras para las ciudades del Alto Perú, pero por la alta presencia de masas indígenas, suponemos que, con excepción de las ciudades del Oriente Altoperuano, la proporción de miembros del patriciado en el total de su población debe haber sido extremadamente baja.

De las regiones que más padecían de acusaciones de nepotismo el Alto Perú figuraba entre las primeras. Y en el Alto Perú, la provincia de La Paz era una de las que más asiduamente venía sufriendo conflictos de esta naturaleza.<sup>2507</sup> A diferencia de las provincias abajeñas, en La Paz, al igual que en el resto del Altiplano, existía una minoría blanca en medio de una inmensa masa indígena. En 1777, en oportunidad de haberse elegido de alcalde de primer voto a Francisco Tadeo Díez de Medina,<sup>2508</sup> el Alcalde de segundo voto Andrés Calderón y Sanginés, el Alcalde Provincial Bernardino Argandoña y el Alférez Real Tadeo Ortiz de Foronda impugnaron la elección alegando que votaron por Medina su tío Tadeo Díez de Medina y su primo Clemente Vidangos.<sup>2509</sup> Pero no habiendo incurrido en los grados de parentesco que la ley prohibía el Fiscal de la Real Audiencia concluía "...que no debe anularse la elección por este capítulo".<sup>2510</sup>

También se dieron entre los diversos clanes de los patriciados provinciales numerosos pactos o concordias para impedir la intromisión en sus distritos de las autoridades correspondientes a jurisdicciones centrales. En La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán y los Villafañe celebraban su unidad practicando concordias. Primero en 1708 y setenta años después, en 1781, con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado Riojana firmó concordias, donde acordaba su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.<sup>2511</sup>

Si bien tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba. Este cambio de jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de la provincia, marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú y con Chile. Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y minera en manos de una elite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo. Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán de Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando en 1781 una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.<sup>2512</sup>

En esta unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que detallamos en los Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el mando.<sup>2513</sup> Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila, perteneciendo a las mismas la riojana Felipa Tagle y Castro, la cual se desposara con el

Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de soldados a Manuel José Derqui,<sup>2514</sup> yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,<sup>2515</sup> y como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.<sup>2516</sup> La Casa de los Villafañe llegó a incorporar a fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,<sup>2517</sup> Manuel del Rincón y Escudero,<sup>2518</sup> y Favián González,<sup>2519</sup> uno de los Administradores particulares designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,<sup>2520</sup> quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortiz de Ocampo en 1794.<sup>2521</sup>

Quien por primera vez enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al extremo de ser repetidamente impedido de ingresar al Cabildo, fue el Administrador General de Tabacos, Don José Antonio Mercado,<sup>2522</sup> pariente de la mujer de Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.<sup>2523</sup> No obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una profunda enemistad originada en su desempeño como Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y en el pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y Castro le seguía por las tierras de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.<sup>2524</sup> Amén de Ocampo, el Alcalde Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una profunda inquina, al extremo de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo que "vendía malos tabacos".<sup>2525</sup> Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se sumaron al bloque oficialista Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y Dávila.<sup>2526</sup> Sin embargo, estos dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de ser parientes dentro del tercer grado de afinidad.<sup>2527</sup> Finalmente, Mercado fue arrestado bajo la injusta acusación de haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle.<sup>2528</sup> A más de haber abandonado el relevo, Mercado fue acusado también de haber esquilado a sus soldados con el juego y la venta de bebidas espirituosas.<sup>2529</sup> En realidad, las tropas fueron sublevadas por el Comandante Juan José de Villafañe y Dávila,<sup>2530</sup> "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo compuesto de sus allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".<sup>2531</sup> Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe apareciese como de Mercado. Con la explotación del Cerro de Famatina, a partir de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la antigua estructura de poder en La Rioja sufrió un cambio tan radical, que su patriciado necesariamente volvió a fragmentarse en dos facciones, al igual que a fines del siglo XVII. Por un lado aquellos más ligados a la producción minera del Cerro y a las políticas unitarias dirigidas desde Córdoba (la Casa de los Dávila), altamente dependientes de la provisión de azogue con que refinar su mineral, y por el otro lado aquellos vecinos más ligados con el comercio y la explotación agraria de Los Llanos, más afines a los vientos federalistas que soplaban desde el litoral Artiguista (la Casa de los Ocampo u Ortiz de Ocampo).<sup>2532</sup>

## **Y-I Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.**

Entre las regiones que padecían en sus elecciones concejiles de amenazas de nulidad Cuyo era otra de las que se destacaba por las acusaciones de nepotismo. Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de Sobremonte y el Pbro. Domingo García,<sup>2533</sup> al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae la Tabla H-I, fundada en los datos proporcionados por Larrouy (1927), para las

provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una aproximación numérica, con relación a la proporción de población patricia respecto de la población mercantil forastera.<sup>2534</sup> De todas maneras las prácticas centralizadoras Borbónicas, desplegadas en Cuyo, que intentaron relegar del poder comunal a las antiguas oligarquías fueron de un grado inusitado. Ellas estaban originadas en: a) la expulsión de los Jesuitas, b) la prohibición de comerciar impuesta al clero; c) la creación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y d) el desplazamiento de la Real Audiencia de Chile --que significara la creación del nuevo Virreinato del Río de la Plata.<sup>2535</sup> En San Juan, el nuevo patriciado intentó relegar de la composición del Cabildo a los antiguos clanes de los Sánchez de Loria, los Irrazábal, y los Albarracín; y en Mendoza logró con éxito desplazar al antiguo clan de los Videla.<sup>2536</sup>

En tanto, en Mendoza, el monarca había prohibido en 1760 por Real Cédula que la Real Audiencia de Chile eligiera de Corregidor de Cuyo a un vecino del lugar, "...por los desórdenes que hubo cuando lo fue de ella [Francisco] Videla y Aguiar".<sup>2537</sup> Veinte años después, en 1782, el mismo Francisco Videla y Aguiar,<sup>2538</sup> fue desterrado de Mendoza, conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta Videla,<sup>2539</sup> por negarse a participar de la represión de los seguidores de Túpac Katari.<sup>2540</sup> Una nueva oligarquía, ligada a la liquidación de los bienes de los Jesuitas, y fundada en el poder político y económico de las familias de Juan Luis Corvalán de Castilla,<sup>2541</sup> Juan Martínez de Soto y Rozas,<sup>2542</sup> y José Sebastián Sotomayor,<sup>2543</sup> había ocupado el escenario político de Mendoza.

Con la Real Ordenanza de Intendentes (1782), la disminución del poder relativo del Cabildo Cordobés, condicionó la naturaleza de las crisis políticas que se sucedieron en lo que restaba de la dominación colonial, exportando los conflictos a las cabeceras de las provincias cuyanas (Mendoza, San Juan y San Luis). Cuyo, que había pasado en 1778 de la jurisdicción de la Capitanía General de Chile a la de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, fue otra de las regiones donde el nepotismo practicado en las elecciones concejiles amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. En 1782 se produjo en Mendoza una conspiración integrada por una facción capitular,<sup>2544</sup> adversaria de las llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron desterrados el suegro del Alcalde Raymundo Pelliza, Francisco Videla y Aguiar,<sup>2545</sup> conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta.<sup>2546</sup>

Dos años después, en 1784, una vez promulgada la Real Ordenanza de Intendentes, las denuncias contra las tres casas reinantes que iniciara en 1778 Francisco de Serra y Canals,<sup>2547</sup> las continuó esta vez el Comandante de Fronteras José Francisco Amigorena,<sup>2548</sup> tomando como objeto de sus acusaciones al Capitán de Milicias y Maestre de Postas Nicolás Santander y Corvalán.<sup>2549</sup> El propio Santander, cuestionado por Amigorena en virtud de acumular una Maestría de Postas y una Capitanía de Milicias,<sup>2550</sup> replicaba que el Comandante "...no ahorra ocasión de bomitar pestes contra los de mi segundo apellido viviendo al todo separado de nosotros...teniendo horror de pisar los umbrales de las casas comprendidas en esta su desgracia".<sup>2551</sup> Siete años después, en 1792, la candidatura a alcalde de segundo voto de Manuel José de Godoy y Rojas,<sup>2552</sup> miembro por matrimonio de una de las tres casas reinantes, fué revocada por "...el impedimento de comprenderse por la relación de parentesco de primo hermano por afinidad con el Alférez Real Nicolás Corvalán".<sup>2553</sup> Más luego, en 1800, el candidato a Alcalde de segundo voto Fernando Güiralde, <sup>2554</sup> también fué impugnado por haber sido elegido por su concuñado.<sup>2555</sup> Esta impugnación fue hecha esta vez por Nicolás Corvalán,<sup>2556</sup> quien eligió en su lugar como Alcalde a su propio primo hermano Domingo Corvalán.<sup>2557</sup> Tres años

más tarde, en 1803, la elite mendocina se hallaba dividida entre aquellos miembros Diputados del Gremio de Hacendados,<sup>2558</sup> y aquellos otros miembros Diputados del Gremio de conductores de carretas.<sup>2559</sup> Para ese mismo año de 1803, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Télles Meneses Sodré,<sup>2560</sup> también perteneciente por matrimonio a una de las tres casas reinantes, luego de batallar por las elecciones anuales de los alcaldes, manifestando que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".<sup>2561</sup>

denunciaba que aún en el caso de reunirse los vocales para la elección anual, "...podría no resultar elección legal".<sup>2562</sup> Y esto último, por cuanto por ser hermanos el Regidor Juan de la Cruz Vargas, y el Alguacil Mayor Rafael Vargas,<sup>2563</sup> y primos hermanos los Regidores Francisco Xavier Molina,<sup>2564</sup> y Bentura Cabero,<sup>2565</sup> "...es fácil que se defectúe la elección".<sup>2566</sup> Esta deformación se podía dar, según Télles, por cuanto "...los dos hermanos pueden sufragar al contesto de los dos primos, y estos al de los hermanos, recompensándose mutuamente, sin que el quinto vocal pueda hacer oposición por ser sólo".<sup>2567</sup>

Asimismo en San Juan, el nepotismo y el etno-centrismo practicado en las elecciones concejiles amenazaba desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. La hegemonía capitular de la facción llamada beata se había logrado perpetuar hasta el filo de la misma revolución. En efecto, en 1808, el Regidor Decano y Alférez Real de San Juan José Ignacio Fernández Maradona,<sup>2568</sup> el Alcalde Provincial Juan Rufino Flores Hurtado, y el Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado,<sup>2569</sup> elevaron un recurso al Gobernador de Córdoba reclamando que en los oficios concejiles de San Juan "...se guarden huecos, parentescos, y solvencias para evitar que estos oficios se vinculen en las familias contra la buena administración de justicia".<sup>2570</sup> Una buena administración debía interesarse, según los citados regidores, en la circulación de los oficios "...para que todos los ciudadanos participen de los honores de la Patria".<sup>2571</sup> Sin embargo, la elección del Alcalde de Primer Voto había recaído en 1808 en Pedro Carril,<sup>2572</sup> quien era hermano de Don Justo, Regidor Alguacil Mayor en 1806 y doble hermano político del Regidor Fiel Ejecutor Don Francisco Borja de la Rosa.<sup>2573</sup> También era Carril, como lo podemos ver cotejando el Cuadro SJ-I con el Cuadro SJ-II, pariente consanguíneo del Regidor Alejandro Albarracín,<sup>2574</sup> quien lo era también del Alcalde de Segundo Voto Don José Antonio de Oro,<sup>2575</sup> y de Don José María Torres. La elección del Alcalde de Segundo Voto había recaído en Pedro José de Echegaray,<sup>2576</sup> tío de consanguinidad con el Alcalde de la Santa Hermandad electo José María de Echegaray, y de afinidad con el Alférez Real que quedaba.<sup>2577</sup> La elección de los Regidores Defensores de Menores y de Pobres había recaído en Don Alejandro Albarracín y en Rosendo Frías respectivamente. De Albarracín se consignaba que era pariente de consanguinidad dentro del cuarto grado y de afinidad en el mismo grado con los electores que se han referido, y de Frías que

"...sin diez años de vecindad, ni casa poblada, y que no tiene ni se le conoce Finca Raíz, y caudal abundante ni mediocre para la responsabilidad a que por su ministerio de regidor se halla suxeto".<sup>2578</sup>

Finalmente, la elección del Procurador Síndico General de la Ciudad había recaído en Don Martín Gomed, hermano político del Regidor Don José Cortínez, cuyo mandato vencía, y del Regidor Alcalde Provincial, cuyo mandato se renovaba, "...con cuyas dos hermanas estaban casados [el] elector y [el] elegido".<sup>2579</sup>

Y cuando con motivo de las elecciones concejiles celebradas en San Luis, en 1808, fuera elegido y confirmado Don Estéban Ramos para el cargo de Alcalde de primer voto del Cabildo de San Luis, sus miembros capitulares Don Tomás Baras, Don Francisco Rodríguez, Don Isidro Calderón, y Don Juan de Amieba Díaz alegaban que de ciertos sujetos beneficiados por la confirmación del Gobernador Intendente de Córdoba "...no permitían dispensar semejante diligencia la justicia ni la razón".<sup>2580</sup> Ese era el caso de Estéban Ramos por cuanto se ha dicho que era deudo (pariente) de Don Francisco Vicente Lucero

"...pues también sucede lo propio con Don José Lucero elegido para Síndico Procurador de Ciudad, como primo hermano de Don Francisco, con Don Tomás Luis Lucero electo Alguacil Mayor, que es sobrino del primero, con Don Pedro Ignacio Pérez Defensor de Menores que se halla en igual grado que el antecedente con el mismo, y con Don José González Pena, Regidor Defensor de Pobres elector, que es deudo del referido Don Francisco Lucero".<sup>2581</sup>

Más aún, en el escrito de expresión de agravios elevado en el recurso de nulidad e injusticia notoria entablado contra el auto del Gobernador-Intendente de Córdoba, el abogado Antonio de Ezquerreneña manifestaba

"...que la prohibición de sufragar en los grados de consanguinidad y afinidad, deve entenderse no sólo entre los electores y elegidos dando a estos aquellos, sus sufragios, si también aún quando no les huviesen prestado y dimanasen de otros capitulares con quienes no tengan conección".<sup>2582</sup>

Esta última interpretación brindada por Ezquerreneña, se fundaba en el irrefutable principio de que el espíritu de la ley era no sólo impedir que sufragaran quienes entre sí padecieran de vínculos de afinidad o consanguinidad sino también simplemente "...prohibir la sucesión de los empleos y sus familias".<sup>2583</sup>

## **Y-II Las prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.**

En lo que hace a las provincias litoraleñas, Santa Fé, dado el corto número de su vecindario apto para los cargos concejiles, la Corona le había concedido a su Cabildo el privilegio de elegir como Alcaldes ordinarios a los mismos Regidores. Pero la facción santafesina opuesta a dicha medida, liderada por Juan Francisco Aldao,<sup>2584</sup> quiso en 1780 ponerse de acuerdo en el número de vecinos aptos para ser elegidos en los oficios concejiles, conceptuando

"...que para Alcaldes Ordinarios y Procurador General hay 45 vecinos desta Ciudad y 4 de la Campaña, para Alcaldes de la Hermandad 50 vecinos de la campaña, y para Mayordomos 25 vecinos desta ciudad".<sup>2585</sup>

Estas últimas cifras concuerdan con las dadas para la ciudad de Córdoba en la misma época. No obstante el holgado número de vecinos en condiciones de votar y ser votado, la

administración real y municipal fué monopolizada primero por las casas patricias de los Martínez del Monje y más luego por las casas de los Maciel y los Vera Mujica.

En la primera mitad del siglo XVIII, el comercio exclusivo de la yerba producida por los Jesuitas, y la instauración del llamado puerto preciso en la ciudad de Santa Fé, destinado a debilitar a las familias patricias del Paraguay, en gran medida hallada culpable de haberse amotinado en la llamada Revolución de los Comuneros (1721-35), consolidó en el poder de Santa Fé a la familia patricia de los Monje, al extremo de marginar de esta ciudad a aquellos elementos que no se sometían a su hegemonía. Entre dichos elementos no asimilables a la Casa de los Monje estaban Don Juan de Zeballos,<sup>2586</sup> y su yerno Don Antonio Candiotti y Mujica.<sup>2587</sup> El suegro Zeballos pudo en 1745 presentar ante el Cabildo de Santa Fé un despacho expedido por el Teniente General de la Gobernación por la cual lo restituían en su empleo de Regidor. En dicha presentación Zeballos revela la base social del poder de los Monje. El Cabildo de Santa Fé estaba compuesto del Regidor Don Miguel Martínez del Monje,<sup>2588</sup> del Teniente General Don Francisco Antonio de Vera Mujica,<sup>2589</sup> del Alcalde de Primer Voto Pedro Florentino de Urizar,<sup>2590</sup> y del Alguacil Mayor Pablo Navarro, estos dos últimos cuñados de dicho Teniente General, así como del citado Regidor Martínez del Monje, tío carnal del mencionado Urizar.<sup>2591</sup> La reelección en dicha oportunidad del Alcalde Urizar, a juicio de Candiotti, era nula porque para ser reelecto en dicha vara no tuvo Urizar

"...más voto que el suyo, el de su concuñado Don Pablo Navarro y el de su tío carnal Don Miguel Martínez del Monje, por que el Alcalde de Segundo Voto su sobrino por afinidad se fué a Chile antes de las elecciones, y el único regidor que no era de su familia ni su pariente inmediato, que fué mi suegro, le expulsaron del Cabildo en la forma referida".<sup>2592</sup>

También debía ser nula esta elección

"...por que ha más de diez años sino ha veinte que la dicha vara de Alcalde de Primer Voto está vinculada a esta Casa de los Monjes, pasando de unos a otros entre hermanos, cuñados, tíos, primos, yernos, sobrinos y parientes practicando lo mismo con la de segundo voto".<sup>2593</sup>

Esta composición familiar obedecía al "...ánimo de no tener otro en el Cabildo que pueda embarazarles sus operaciones".<sup>2594</sup> Teniendo asimismo los miembros de la Casa de los Monje varios litigios que seguir contra otros vecinos,

"...en un año son partes y en otro año son jueces en los mismos autos y causas...por lo que todas las demás familias de aquel vecindario viven ajadas y ultrajadas expuestas a dejar sus casas y conveniencias mudándose a otra ciudad por el conocido agravio que en éstas se les hace".<sup>2595</sup>

Por no ser estos vecinos perseguidos como lo era el suegro de Candiotti, no había en 1745 vecino en Santa Fé que se atreviera

"...a hacer postura ni en propiedad ni en arrendamiento a cualquiera de todas las demás varas de aquel Cabildo que ha muchos años están vacas y lo estarán siempre sino se remedian estos desórdenes".<sup>2596</sup>

Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el cargo de Depositario de los bienes de las Temporalidades, en Santa Fé, había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín Maciel,<sup>2597</sup> quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas sin dar cuenta detallada alguna".<sup>2598</sup> Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Múxica reproducían la misma conducta que en el período anterior había desplegado la familia de los Monje. Las elecciones hechas en 1772, que recayeran en Francisco Crespo,<sup>2599</sup> y Pedro de Mihura, fueron impugnadas por el Alguacil Mayor Cayetano Ximénez Naharro. La de Crespo por haber participado en la elección su propio padre José Crespo. Y la de Mihura por vivir "...amancebado con una parienta muy cercana de Juan Francisco Roldán, el cual es entenado del Alguacil Mayor Ximénez".<sup>2600</sup> Ninguno de estos obstáculos concurrían, según el Alguacil Mayor Ximénez, en las candidaturas de Pedro Florentino de Urizar,<sup>2601</sup> y de Lucas de Echagüe y Andía.<sup>2602</sup> Si bien Urizar estaba casado con Antonia de Vera Mújica, y Lucas de Echagüe con María Josefa de Vera Muxica, una sobrina carnal de la anterior, dichos parentescos no habrían sido para el Alguacil Mayor Ximénez

"...en el grado que prohíbe el derecho se vote por él, ni éste [Echagüe] tuvo hijos para que pudiese subsistir el enlace, o razón que precaben las Leyes de la amistad y proporción para influir en que no tenga lugar la independencia".<sup>2603</sup>

Más aún, en el acuerdo del 24 de diciembre de 1779, el Regidor Decano Juan Francisco Aldao, había calificado (ponderado) los votos del regidor y Alcalde de segundo voto Don Luis de Hereñú y el del Regidor Tomás Vicente de Hereñú en un sólo voto, por el sólo hecho de ser hermanos.<sup>2604</sup> Igualmente, por el hecho de ser cuñados, Aldao graduó por uno los sufragios del Alcalde de Primer Voto Tomás Vicente de Hereñú y el del Alférez Real Pedro de Urizar.<sup>2605</sup> Para el abogado fiscal Dr. José Pacheco y Gómez,<sup>2606</sup> aún más extrañeza debía causar que en la confirmación del Alcalde de primer voto se pospusiese a Juan Antonio de la Elguera,<sup>2607</sup> confirmando a Tomás Vicente de Hereñú, en atención al hecho de que había alcanzado la mayoría de los votos, cuando en realidad el primero [Elguera] estuvo electo por tres capitulares, y si bien el segundo [Hereñú] tuvo cuatro [sufragios] "...uno de los electores fué su hermano el Alcalde de segundo voto Don Luis Hereñú y otro de los electores fué el mismo electo [Hereñú]".<sup>2608</sup> A trueque de exceder al otro, Hereñú no dudó en elegirse a sí mismo "...sin tropezar con el escollo [escrúpulo] de la ambición a la vara".<sup>2609</sup> Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y aliados, Aldao concluía que "...estos dispondrán a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos solos serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".<sup>2610</sup> Siendo ellos la mayoría "...estarán eternamente los empleos públicos en sus manos".<sup>2611</sup> De esta situación se desprenderán, según Aldao, innumerables perjuicios:

"...No tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que considere que el encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las edades, y se verá en la consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por fuerza el despotismo sobre sí y sobre sus haciendas".<sup>2612</sup>

Aldao, quien pertenecía a una facción íntimamente vinculada con la producción de cueros, remataba su parecer afirmando que las familias del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía,<sup>2613</sup> la de Joaquín Maziel, y la de José de Vera Muxica,<sup>2614</sup> tradicionalmente ligadas al comercio de la yerba mate, "...están unidas con los vínculos del parentesco, y después de 10 o 12 años, no hay exemplar que alguno de ellos no obtenga un empleo de justicia".<sup>2615</sup> Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y aliados, Aldao concluía que estos dispondrán "...a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos

solos serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".<sup>2616</sup> Siendo los parientes la mayoría, Aldao razonaba que "...estarán eternamente los empleos públicos en sus manos".<sup>2617</sup> De dicha realidad se seguirían innumerables perjuicios

"...el Pueblo se acostumbrará a mirar a una familia con el temor de que en ella es hereditario el mando: no tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que considere que el encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las edades, y se verá en la consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por fuerza el despotismo sobre sí y sobre sus haciendas".<sup>2618</sup>

Consecuente con esta posición, un año después, en 1781, Aldao probó la coherencia de su posición, por cuanto habiendo Juan Antonio de la Elguera y José de Vera Muxica elegido por Alcalde de primer voto a su propio cuñado Francisco Antonio Candiotti y Zevallos,<sup>2619</sup> Aldao "...dixo estarle impedido por derecho así el votar por cuñado, como su conformación por él".<sup>2620</sup>

A partir de la Paz de Versailles (1783) y la Real Ordenanza de Intendentes (1784), la composición del Cabildo de Santa Fé había cambiado radicalmente, beneficiando a la facción liderada por Juan Francisco Aldao,<sup>2621</sup> íntimamente ligada primero al tráfico de mulas y luego a la producción de cueros, y perjudicando a la encabezada por los Maciel y los Vera Múxica, tradicionalmente vinculada al comercio de la yerba mate y a los privilegios del Puerto Preciso. En este período Aldao cambió su hasta entonces irreprochable conducta, crítica del nepotismo, erigiéndose en cabeza de una dinastía que hubo de perdurar en el gobierno de Santa Fé (Ver Cuadro F-I).

Este cambio de política en la conducta de Aldao se puede observar especialmente en las elecciones de 1785, 1787, 1788 y 1789. En 1785 Aldao votó para Alguacil Mayor por Gabriel de Lassaga y Gamboa,<sup>2622</sup> con quien tenía parentesco de afinidad por estar casado Lassaga con prima hermana del Cap. Juan Francisco Echagüe,<sup>2623</sup> para 1786 votó para Alcalde de segundo voto a Manuel de Toro y Villalobos,<sup>2624</sup> para 1787 votó para Alcalde a José Teodoro Larramendi y Arias de Cabrera,<sup>2625</sup> "...siendo este pariente consanguíneo en uno de los grados que prohíben las leyes de Castilla con el Alférez Real que representa"; y para 1788 votó para Alcalde a Félix Joaquín Troncoso,<sup>2626</sup> "...siendo este tío carnal del Alguacil Mayor [José Gabriel Lassaga y Echagüe y Andía] y pariente de Don José de Vera Múxica en segundo grado".<sup>2627</sup> De igual manera Aldao estaba empeñado en que fuera Procurador General Luis Martín Caminos, hijo del Director de la Junta de Temporalidades Ambrosio Ignacio Caminos. El mismo Regidor Aldao, que era vocal de la Junta de Temporalidades, también era, según lo afirmaban los firmantes del escrito antecedente, deudor de la misma. De aquí que Don Ambrosio Caminos era "...servido por el mismo Aldao y por el Alcalde de primer voto Director de la misma Junta y de Aldao, y también de su hijo Don Luis Martín".<sup>2628</sup> Con que resultaba que subsistiendo la elección contraria, "...una sola persona será la que deba, la que demande, y la que mande".<sup>2629</sup> Don Ambrosio Caminos sería entonces

"...el que dirigirá a Don Teodoro de Larramendi y a Juan Francisco Aldao como deudores de Temporalidades, el que dirigirá a su hijo Luis Martín como Procurador General promovente de los intereses de estas y el que dirigirá al mismo Juan Francisco Aldao como Juez vocal que ha de mandar en la Junta sobre lo que el mismo debe y Don Luis Martín demanda".<sup>2630</sup>

Semejante plan de votación, alegaban con todo derecho los denunciantes mencionados, es querer "...refundir todas las acciones en una sola persona [Aldao], cuya solución abominan las leyes, la razón, y la recta justicia".<sup>2631</sup>

En 1791, vuelve a plantearse en Santa Fé la vieja antinomia entre la casa de los Echagüe y la casa de los Aldao. Pero esta vez el problema es suscitado por cuanto el candidato de la facción tradicional de los Echagüe, antiguamente ligada al comercio de yerba y al puerto preciso, era en realidad un niño llamado José Ignacio de Echagüe,<sup>2632</sup> "...que hasta aquí no salió del regazo de la Señora su madre".<sup>2633</sup> Si bien es cierto, como Juan Francisco Roldán lo reconocía, que el cargo le correspondía a su buen nacimiento y educación,

"...ello que importa, si por otra parte, carece de toda instrucción en asuntos de Justicia, y no ha tenido intervención alguna en el manejo de los cargos públicos,...[por lo cual] se verá en la necesidad de obrar solamente como niño, lo que sus parientes que lo han elegido le enseñen".<sup>2634</sup>

En cambio, el candidato opuesto, Don Ignacio Pantaleón Crespo Carballo,<sup>2635</sup> fuertemente ligado primero al comercio de mulas y luego a la producción de cueros, ya había sido Alcalde ordinario y "...correspondió con su gobierno y recta conducta, al nombramiento que en él se hizo".<sup>2636</sup> Si bien era cierto que la mujer de Crespo, María del Tránsito Zavala, era prima hermana del Alguacil Mayor José Manuel Troncoso Zavala, y que era fiador del Ministro de Real Hacienda Rafael María Guerrero Montañes,<sup>2637</sup> Roldán no veía que el parentesco de la esposa de Crespo con el Alguacil Mayor

"...pueda perjudicar el nombramiento que yo he hecho en él, toda vez, que no lo ha hecho el Alguacil Mayor, que es el Pariente, y que por el mismo echo, de no haber querido éste concurrir a su nombramiento, se pone patente, una prueba nada equívoca, de la independencia con que el dicho Crespo se maneja, aún con sus parientes".<sup>2638</sup>

De igual manera, en lo que hacía a su rol como fiador del Ministro de Real Hacienda, era también cierto

"...que la fianza por Don Rafael Guerrero, no tiene conexión alguna, ni dependencia, con la jurisdicción ordinaria de los Alcaldes, porque pende del conocimiento de los Jefes encargados de las causas de Real Hacienda, y así es visto que dicha fianza no le puede ser de obstáculo ninguno para ser Alcalde Ordinario".<sup>2639</sup>

De las prácticas burocráticas nepóticas la renuncia de oficios era la más común. El Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José Morcillo Baylador renunció en 1786 el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras durare la minoridad del hijo en Juan de Pereda y Morante.<sup>2640</sup> De igual manera, renunciaron sus oficios en 1793 el Alcalde Provincial de Buenos Aires Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio Mantilla,<sup>2641</sup> el Alcalde Provincial de Santiago del Estero Roque López de Velasco en su hijo José Antonio López de Velasco,<sup>2642</sup> y en 1797 el Regidor Sanjuanino Pedro Sarmiento de Quiroga.<sup>2643</sup>

En cuanto a Corrientes, también padecía en sus elecciones concejiles de amenazas de nulidad provocadas por acusaciones de nepotismo.<sup>2644</sup> Lamentablemente, las cifras de

población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae la Tabla H-I para las provincias del norte, no nos permite tampoco en este caso inducir una aproximación a la población patricia ni a la población mercantil forastera. Corrientes contaba para 1751 con 440 familias, para 1753 con 300 vecinos, para 1760 con 1440 milicianos, y para 1769 con 1021 milicianos.<sup>2645</sup>

### **Y-III La hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.**

El caso de la provincia de Corrientes fue totalmente peculiar por la fuerte presencia de un bloque de facciones políticamente ajesuitado enfrentado a otro de patricios o españoles americanos. El bloque ajesuitado estaba liderado por el Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio,<sup>2646</sup> Este genearca, entre cordobés y correntino, cuya descendencia estudiamos en el Cuadro CRR-I, estaba vinculado con el patriciado cordobés pues era padre de Juan José de Dícido y Zamudio, casado con Tadea Echenique y Garay.<sup>2647</sup> Su solar patricio lo integraban sus hijos varones y sus yernos Nicolás Patrón y Centellas, José de Acosta y López Lisperguer,<sup>2648</sup> y Ziprián de Lagraña.<sup>2649</sup> La base material de este solar patricio habría consistido esencialmente en la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones, y en el tráfico mercantil con Buenos Aires. En cuanto a la facción anti-jesuítica, estaba liderada por Pedro Bautista Casajús, propietario de una gran estancia en Las Saladas.<sup>2650</sup> Su solar patricio, que analizamos en el Cuadro CRR-II, estaba integrada por sus hijos varones Gregorio,<sup>2651</sup> Bernardo,<sup>2652</sup> Sebastián,<sup>2653</sup> y José, este último párroco de Saladas, así como también sus yernos Miguel de Esquivel y Saravia, José de Silva y Osoreo, y Alonso Hidalgo Viera y Torres.<sup>2654</sup>

Pero debido a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía del litoral se entró a dinamizar con la exportación de cueros, los linajes patricios comenzaron a enfrentarse entre sí por el derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el circuito de la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones y con la comercialización de la yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal motivo por el cual a la facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-élite con fuertes elementos anti-jesuíticos. De todos los miembros del patriciado anti-jesuítico, el único que demostró tener una fuerte inclinación por el comercio fué Don Sebastián Casajús. Si bien su giro fué tres veces menor al alcanzado por su competidor de la facción pro-jesuítica José de Acosta, entre 1744 y 1769 Don Sebastián viajó a Buenos Aires en diez oportunidades contrayendo obligaciones entre otros con Domingo Basabilbaso y Juan de Lezica y Torrezuri, para traer mercaderías por valor de \$15.138.<sup>2655</sup>

En cuanto a la competencia política, la década del 50 estuvo marcada por la hegemonía de la Casa pro-jesuítica de los Zamudio, con el liderazgo de Nicolás Patrón y Centellas, uno de los oficiales que participaron en las Guerras Guaraníticas. Así es que, en 1750, cuando fué electo como Alcalde de primer voto Alonso Hidalgo,<sup>2656</sup> yerno de Pedro Bautista Casajús, el Gobernador José de Andonaégui, con dictámen del Teniente General y Asesor José de Acosta, con cuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, desaprobó el nombramiento de Hidalgo por haber tomado parte en su votación, sus cuñados y con cuñados, todos hijos o yernos de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández.<sup>2657</sup> Posteriormente, en 1757, Sebastián de Casajús se desquitó con éxito del bando jesuítico pidiendo la nulidad de los votos dados por Juan Solís,<sup>2658</sup> y su cuñado el Alguacil Mayor Amaro Gómez,<sup>2659</sup> en favor de la candidatura para alcalde de Xavier Solís.<sup>2660</sup> En su presentación, Don Sebastián manifestaba que Don Nicolás Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento".<sup>2661</sup>

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".<sup>2662</sup> Más aún, Don Sebastián le expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".<sup>2663</sup> Un año más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda, le expresaba al Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastián Casajús, que

"...aquí no se vé más ley ni razón que la pasión de los que mandan, aunque sea contra toda razón, ni ai quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".<sup>2664</sup>

Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".<sup>2665</sup> Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las autoridades] a maliciar de lo que hablan".<sup>2666</sup> Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí, sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los coxan por enemigos".<sup>2667</sup>

Finalmente, con motivo de estas protestas y del fiasco que significó la impugnación de Xavier Solís, Nicolás Patrón decidió retirarse del ruedo político, no sin antes tratar de mudar el mando en su cuñado Ziprián de Lagraña. Al cabo de dos años, en 1760, al elegir el Alcalde de Primer Voto Ignacio de Soto, aliado de la Casa de Zamudio, a su concuñado José Ignacio Cabral, como su sucesor, fué impugnado por Pedro Bautista y Sebastián Casajús, padre e hijo.<sup>2668</sup> La impugnación se fundaba en hallarse tanto Cabral como Soto incurso en la prohibición de la Ley 5, Título 10, Libro 4 de la Novísima Recopilación, por estar casados con dos hermanas.<sup>2669</sup> Sin embargo, y pese a no haber sacado Cabral la mayoría, y haber ganado Bartolomé de Quiroga,<sup>2670</sup> el Teniente Gobernador Bernardo López confirmó a Cabral, "...por concurrir en el sujeto todas las prendas y requisitos necesarios, de pacífico, desinteresado e imparcial".<sup>2671</sup> Amén de las virtudes personales que adornaban al elegido, López alegaba que no sólo la epiqueia,<sup>2672</sup> permitía la elección mencionada, sino también las

"...circunstancias presentes de la quietud, y paz pública, que se debe anteponer a cualesquiera motivo o causa, maiormente no siendo la Ley con expresada nulidad, sino instructiva, pues, si el soberano se hallara enterado de los motivos, que me han inducido para la confirmación, no dudo lo tendría a bien".<sup>2673</sup>

Pedro Bautista y Sebastián de Casajús estaban ciertos que el propio Cabral, quien por otro lado era el tío carnal del último,

"...desea que se prefiera al citado [Bartolomé de] Quiroga] en el oficio así por estar [Quiroga] casado con sobrina carnal mía, hija de su hermana, como por hallarse con avanzada edad y cargado de achaques habituales, particularmente el de los ojos que está casi ciego".<sup>2674</sup>

Por último, Casajús padre e hijo se lamentaban que el Teniente Gobernador López no sólo hubiere abandonado el principio de la pluralidad (mayoría) de votos "...que así en lo eclesiástico y secular como en lo político y militar hace elección canónica", sino que tolerara la violación de la ley citada,

"...con que se abrirá la puerta para que en lo sucesivo aia exemplar que sirva de pretexto para establecerse en el particular una perjudicialísima irrupción o corruptela, de modo que debiendo ser esta especie de oficios Añales bendrán a haserse vitalicios y hereditarios en esta o en la otra Casa o familia, y el quererlo interrumpir será levantar una escandalosa quimera".<sup>2675</sup>

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en Corrientes no lograron desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía pro-jesuitica. Después de la Rebelión de los Comuneros de Corrientes,<sup>2676</sup> acontecida en octubre de 1764, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fue copado por los ajesuitados encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego Familiar del Santo Oficio de la Inquisición Ziprián de Lagraña (ver Cuadro CRR-III).<sup>2677</sup>

Más adelante, en oportunidad de las elecciones de 1771, habiendo los primos hermanos políticos Martín Gonsález de Orduña y Juan García de Cossio,<sup>2678</sup> miembros del clan de los Zamudio, elegido para Alcalde de primer voto a León Martínez de Ybarra y Acosta,<sup>2679</sup> Sebastián de Casajús impugnó la elección en razón de ser sus mujeres primas hermanas carnales. Sin embargo, Orduña refutó dicha impugnación alegando que mal podía el Teniente Gobernador de Corrientes regular el litigio, por ser el impugnador Sebastián de Casajús su hermano carnal.<sup>2680</sup> Tres años más tarde, en 1774, un prosélito de Patrón, que fuera el primer poeta correntino, el Alcalde Juan Antonio de Lafuente,<sup>2681</sup> recusó la candidatura de Juan Estéban Martínez al empleo de Alguacil Mayor.<sup>2682</sup> Si bien la fuente no aclara el motivo de la recusación, la circunstancia de ser Martínez --como se puede observar en el Cuadro CRR-II-- casado con Francisca Hidalgo Casajús, una hija del que fuera en 1750 el Alcalde Ordinario Alonso Hidalgo Viera y Torres,<sup>2683</sup> yerno a su vez del que había sido el caudillo anti-jesuita Pedro Bautista Casajús, explicaría sobradamente dicha motivación.<sup>2684</sup>

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo XVIII aquí relatados, lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

## Capítulo I-H-28 Exogamia en los Cabildos e inmigración de comerciantes peninsulares (1760-1810)

### Índice

- Z-I Repercusión política de la presión demográfica externa en los cabildos provinciales
- Z-II Perpetuación de oligarquías. El caso de Tucumán.
- Z-III Pluralidades capitulares. El caso de Santiago del Estero.
- Z-IV Cuarto grado de parentesco. El caso de Córdoba.

### Introducción del capítulo I-H-28

Aquellas familias del patriciado que no poseían bienes como para constituir dotes respetables, pero sí contaban con una cuota de poder político considerable dotaban a sus yernos o parientes políticos con cargos electivos en los Cabildos, o con cargos en los organismos estatales o para-estatales (Temporalidades, Correo, Renta de Tabaco, Milicia Provincial, Vicariato, Santo Oficio, Cabildo Eclesiástico, Real Hacienda, etc.). Como entonces los patriciados locales se las ingeniaban para eludir las normas jurídicas, casando a sus hijas con comerciantes peninsulares, la Corona se vio asimismo obligada a reiterar por Reales Cédulas la prohibición del parentesco de los cabildantes dentro del cuarto grado civil.<sup>2685</sup> No obstante la instauración de estas normas, los patriciados locales lograron evadirlas arguyendo la prelación del Derecho Común "...que permite puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".<sup>2686</sup> Según dicho Derecho Común

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros, padre por hijo, de cuyo tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".<sup>2687</sup>

Fracasada también la implementación de la *alternativa*,<sup>2688</sup> como mecanismo utilizado por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus hijas con españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos funcionarios que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el parentesco de los gobernantes.<sup>2689</sup>

### Z-I Repercusión política de la presión demográfica externa en los cabildos provinciales

En principio, el aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a

un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.<sup>2690</sup> Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.<sup>2691</sup>

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión inmigratorio varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este último ranking fue elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad de provincia escasa de varones españoles adultos casados. En cuanto al Cabildo de Salta, este había estado hasta la expulsión de los Jesuitas (1767), controlado por una oligarquía constituida por las casas de los Arias Rengell y la de los Saravia, en especial por los regidores Félix Apolinario y José Manuel Arias Rengell e Hidalgo, conquistadores del Chaco Gualamba.<sup>2692</sup> Con dicha expulsión la más dinámica casa de los Cornejo, influida por el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>2693</sup> ocupó gran parte del escenario político. Quienes tuvieron a su cargo poner la Real Orden de expulsión en ejecución fueron los propios hermanos Fernández Cornejo, llegados recientemente de Moquegua, aunque nacidos en Tacna.<sup>2694</sup> Ellos fueron Juan Adrián,<sup>2695</sup> el Dr. Pedro Vicente,<sup>2696</sup> y Antonio Fernández Cornejo y Rendón.<sup>2697</sup>

## **Z-II La perpetuación de oligarquías. El caso de Tucumán.**

En cuanto a Tucumán, las designaciones efectuadas en 1768 por influencia del Gobernador Campero, del Defensor de Temporalidades, recaída en el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo,<sup>2698</sup> y del Alcalde de primer voto Juan Bautista del Campo, vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de Figueroa,<sup>2699</sup> llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en 1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre) entre 1771 y 1775; y su otro hijo Diego Miguel Aráoz, fue Cura Vicario de Monteros. Asimismo, el Gobernador Campero apoyó al primo hermano de estos últimos, Miguel de Aráoz y Echávez,<sup>2700</sup> quien alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772.<sup>2701</sup> Más aún, el rechazo público que el Cabildo de Tucumán, liderado por Pedro Antonio Aráoz, hiciera en 1772 del Administrador de la nueva Renta de Tabaco Gaspar de Salcedo y su aliado Fermín Vicente Texerina y Barreda,<sup>2702</sup> consolidó al clan de los Aráoz.<sup>2703</sup> Sin embargo, la unidad de este clan familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego Ignacio Aráoz, dueño de un patrimonio que rondaba los \$7.000, sus hijos Pedro Antonio y Diego Miguel se disputaron la herencia.<sup>2704</sup>

Por otro lado, el sobrino segundo de estos últimos, el Fiel Ejecutor Juan Antonio Aráoz y Sánchez de la Madrid,<sup>2705</sup> un renegado de la familia Aráoz, conjuntamente con el Regidor Francisco de Texerina y Barreda,<sup>2706</sup> impugnaron en enero de 1778 las elecciones del Cabildo de Tucumán, recaídas en miembros de la facción liderada por el Regidor y Administrador de Correos José Fermín Ruiz Poyo,<sup>2707</sup> cuñado del Fiel Ejecutor, "...por ser violatoria a una Real Cédula que trata sobre la oligarquía [primera vez que se utiliza este término en el Río de la Plata]".<sup>2708</sup> De resultas de dicha denuncia, la "oligarquía" de los Aráoz, que ya se había cuestionado en 1777, parecía sin embargo que en 1780, 1781 y 1782 se perpetuaba en el poder, aunque ahora dirigida por el Regidor Ruiz Poyo. Esta sospecha se basaba en los testimonios obrados en diversos juicios. En uno de ellos, ocasionado por las elecciones de 1780 y sustanciado en 1781,<sup>2709</sup> dirigido contra la facción liderada por Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial y elector del Cabildo Francisco Javier Sánchez de la Madrid,<sup>2710</sup> era denunciado por encabezar una trenza de intereses dinásticos. Sánchez de la Madrid era, como se puede visualizar en el Cuadro T-I simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José Gonsález Thames;<sup>2711</sup> primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde;<sup>2712</sup> y tío carnal de un yerno del Alcalde Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera.<sup>2713</sup> En el mismo juicio, ocasionado por las elecciones de 1780 --en que la parcialidad de Ruiz Poyo, compuesta por cinco electores, eligió para alcalde de primer voto al Sargento Mayor José Figueroa,<sup>2714</sup> y para alcalde de segundo voto a José Velarde, y las otras parcialidades compuestas de tres electores eligieron a Vicente Escobar y Envila,<sup>2715</sup> y Martín Ángel Varón,<sup>2716</sup> -- se cuestionaba a

"...José Figueroa [Mendoza],..., consuegro con una hermana del Alcalde Provincial Sánchez de la Madrid, y a José Velarde, casado con [María Teresa Villafañe] sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial y prima segunda con [Catalina Aráoz] la mujer de Ruiz Poyo".<sup>2717</sup>

Un año más tarde, en 1781, Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial Francisco Javier Sánchez de la Madrid, y Juan García Cárdenas,<sup>2718</sup> eligieron para Alcalde Ordinario de primer voto a José Miguel Medina,<sup>2719</sup> y para Alcalde de segundo voto a Julián Ruiz Huidobro.<sup>2720</sup> De los cinco vocales que le dieron su voto, Vicente Escobar alegaba que la elección era nula porque "...el Alférez Simón Domínguez,<sup>2721</sup> y el Fiel Ejecutor Pedro Antonio Aráoz,<sup>2722</sup> son parientes de Medina".<sup>2723</sup> Una representación de treinta y cinco vecinos,<sup>2724</sup> y los argumentos de Ruiz Huidobro avalaron la elección. No obstante ello, el Gobernador-Intendente de Salta Andrés Mestre,<sup>2725</sup>

"...despreció la elección de aquel Consejo,...y procedió a nombrar por sí solo por Alcalde de primer voto a Miguel Laguna,<sup>2726</sup> y por Alcalde de segundo voto a Juan Gregorio de Aráoz [y Campo Avila],<sup>2727</sup> sujetos no incluidos en la elección del Cabildo".<sup>2728</sup>

Más aún, so pretexto de la autonomía del ayuntamiento Tucumano, el Justicia Mayor Juan Silvestre Deheza y Helgueros,<sup>2729</sup> miembro conspicuo de la facción liderada por Ruiz Poyo e íntimo socio de los comerciantes vinculados al Consulado de Lima,<sup>2730</sup> se opuso a que su colega de Santiago del Estero General Antonio García Villegas actuara en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, para levantar una información sumaria relacionada con la antedicha acusación. Dicha oposición levantó la sospecha de que la perpetuación de una "oligarquía" era una acusación cierta. El apoderado de Fermín Vicente Texerina y Barreda,

de Manuel Padilla y de Martín Ángel Varón, que lo era Joaquín Monzón,<sup>2731</sup> le imputaba al Justicia Mayor Deheza y Helgueros, que para el rechazo judicial practicado tuviera en su devoción "...todos los individuos del Cabildo, pues el que no es hermano es pariente en grado muy próximo".<sup>2732</sup> Asimismo, Monzón se lamentaba que

"...el espíritu de conformidad, unión y confraternidad que les inspira la sangre que ierve en sus venas, sea el que rija el de conformidad a todo lo que se practicaba,...pues todos viven reunidos en un centro de reconciliación siempre que se trate de aniquilar a un miembro del público, que no es de su facción".<sup>2733</sup>

Refiriéndose al Justicia Mayor Helgueros, Monzón advertía con un giro lleno de satírica malicia que

"...vive en el centro, no como aquel que ministra la Paz, según el Oráculo, llenando la Casa consistorial de aquel olor suave, que despide el Bálsamo y buen ungüento del exemplo, sino antes bien la llena de fétor, sólo agradable a sus parciales, que tienen habituados los órganos al olfato de esta sensación".<sup>2734</sup>

En el mismo escrito Monzón sostenía creer que "...siendo todos tan unos en la carne por el enlace de parentesco quanto lo son en el espíritu,...se unirán a pretestar algún informe siniestro, que todo se logrará a medida de sus inicuos pensamientos".<sup>2735</sup> Pero que Informe podrán formalizar, se preguntaba Monzón

"¿...que fuera de estar no sólo afecto a los reatos de obrepción y subrepción,<sup>2736</sup> no esté también ilustrado con las figuras del hiperbaton,<sup>2737</sup> de la anfibolia,<sup>2738</sup> del cohecho, del estelión,<sup>2739</sup> del monopolio (sic), del soborno, y de la inteligencia ninguna otra a la verdad?".<sup>2740</sup>

De resultas de haber obstaculizado el cumplimiento de la delegación hecha en Pedro Antonio Aráoz por el General García Villegas para que se levantara dicha información sumaria, el Gobernador de Salta le hacía saber finalmente al Cabildo de Tucumán por Providencia del 30 de diciembre de 1782 que Deheza y Helgueros cesaba en el cargo de Justicia Mayor. Finalmente, pese al apoyo que el Cabildo le brindara, el Justicia Mayor Deheza y Helgueros tuvo que dejar sus funciones. No obstante su renuncia, el conflicto en el seno del Cabildo no se resolvió, por cuanto también en 1783 el Gobernador de Salta se negó a confirmar las elecciones de dicho año, remitiendo los oficios a consideración del Virrey. Días después el Gobernador de Salta comunicaba al Cabildo de Tucumán que había nombrado interinamente de Gobernador de Armas a Vicente Escobar, y que se había repuesto como Regidor 24 a Texerina y Barreda, el que era aliado de Monzón, Padilla, y Varón.<sup>2741</sup>

Incluso los créditos que devengaban las Temporalidades solían generar favoritismos fundados en el parentesco. En una causa iniciada por el Juez Subdelegado de la Ciudad de Tucumán, apoderado de las Temporalidades, Mariano Zavaleta,<sup>2742</sup> se quejaba a la Junta Provincial de Temporalidades que el Alcalde de Segundo Voto Pedro Antonio Aráoz, exigiese un crédito por el importe de unas mulas, perteneciente a las Temporalidades, a la Testamentaría de José Fermín Ruiz Poyo, primer marido de Catalina Aráoz, y no a la Testamentaría de José de las Muñecas, segundo marido de dicha Catalina Aráoz.<sup>2743</sup> Zavaleta atribuía dicho favoritismo a los "respetos del parentesco" que se interesaban a favor de la pretensora María Elena Alurralde, viuda de Juan de las Muñecas y mujer de José Ignacio Garmendia.<sup>2744</sup>

### **Z-III Las pluralidades capitulares. El caso de Santiago del Estero.**

La importancia numérica de los peninsulares (17) radicados en la ciudad de Santiago del Estero --sobre un total de 128 supuestos patricios (vecinos casados), y 1.315 negros, mulatos y zambos-- concedió el pretexto para provocar también en ella intensos conflictos a nivel municipal. En enero de 1785 José Bravo de Rueda,<sup>2745</sup> le manifestaba al Brigadier Andrés Mestre que habiendo merecido su persona y la de José Lorenzo Gonsebat,<sup>2746</sup> la pluralidad o mayoría de votos en el cabildo "...comenzó el demonio a fraguar tantos enredos que debilitando las más sanas intenciones arrastró con su malicia a la más memorable iniquidad".<sup>2747</sup> El caso fue que pretendiendo los dos Alcaldes y los dos Regidores Propietarios elegir en su lugar de Alcalde de segundo voto a José Antonio López de Velazco,<sup>2748</sup> Bravo de Rueda tuvo que impugnarlos "...por ser el Alcalde de primer voto su primo hermano, el de segundo voto su concuñado, el Regidor Alguacil Mayor [José Miguel Zilveti] también su concuñado, y el Regidor Fiel Ejecutor aparejado con el defecto y tacha de escandaloso público".<sup>2749</sup>

### **Z-IV El cuarto grado de parentesco. El caso de Córdoba.**

En Córdoba, la ciudad que después de Buenos Aires contó con el mayor porcentaje de comerciantes peninsulares, el nepotismo ocupó uno de los lugares más asiduos entre los problemas de derecho público analizados por los juristas y letrados del coloniaje.<sup>2750</sup> Para abordar dicho tema los letrados acudieron a las obras más célebres, entre las cuales descolló la Curia Filípica. El Cabildo de Córdoba recordaba en 1780 que la Curia Filípica contemplaba los casos de elecciones concejiles, y en 1800 el Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo, hacía referencia a la Novísima Recopilación.<sup>2751</sup> Merced a la recepción del derecho hispano en tierras de América, los peninsulares advenedizos pudieron argumentar jurídicamente en sus litigios con las elites criollas. Por representar esta recepción uno de los principales capítulos de cuantos integraron el proceso general de la colonización, mereció siempre la máxima atención de los historiadores.<sup>2752</sup> En Córdoba, el Alcalde Nicolás García Guilleo,<sup>2753</sup> ligado por parentesco político con la casa patricia de los Echenique,<sup>2754</sup> denunciaba en 1780, el incumplimiento de la Real Provisión del 20 de agosto de 1641, que condenaba la designación de alcaldes relacionados entre sí dentro del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos. Tres años antes, en 1777, para impedir el ingreso del candidato a Regidor José de Ariza,<sup>2755</sup> también ligado por parentesco a la casa de los Echenique, el Cabildo de Córdoba, controlado por los Allende,<sup>2756</sup> argüía que la Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación "...prohíbe el que ni los Oficiales Reales, ni sus hijos, deudos, criados, ni allegados puedan tener estos reximientos".<sup>2757</sup> Los Allende habían tomado conciencia de la importancia crucial de copar los oficios venales y honoríficos de los Cabildos en sus frecuentes viajes, que iban desde Buenos Aires hasta Potosí, para vender mulas. Siendo Ariza tan allegado al ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela, "...así por la estrechísima amistad que con el mantiene, cuanto por el oficio de Defensor de Real Hacienda que obtiene", el Cabildo entendía que debía aplicarse dicha prohibición y que Ariza no debía obtener el oficio subastado.<sup>2758</sup> Es preciso hacer presente, decía su concuñado Fernando de Arce y Bustillos,<sup>2759</sup> también emparentado con la casa de los Echenique, en un alegato jurídico presentado en el Cabildo de Córdoba en 1777, que el Alcalde de primer voto Antonio de la Quintana y Sebreros,<sup>2760</sup> era yerno del General Tomás Allende y Losa,<sup>2761</sup> y que José Allende y Losa,<sup>2762</sup> y Santiago Allende y Losa,<sup>2763</sup>

eran hermanos de Tomás de Allende así como Regidores Propietarios de número.<sup>2764</sup> También hacía patente Arce y Bustillos que dichos Allendes

"...pusieron tacha y objeción a la postura [que hiciera] José de Ariza,...y que después de la objeción hizo postura y oposición a este mismo oficio de Ariza, el contenido Tomás de Allende, para un hijo suyo [Pedro Lucas]".<sup>2765</sup>

Esta corruptela ocurría al mismo tiempo que el que luego fue su concuñado Francisco Armesto y Allende, "...hacía postura a otro oficio".<sup>2766</sup> De esa manera, se veía a las claras, para Arce y Bustillos,

"...que el espíritu de la objeción que se puso a José Ariza, y oposición a mi persona no es otro que el de vincular todos los oficios en una Casa para poder distribuir los demás onerosos de la república continuamente entre sí, y que las demás familias y vecinos de honor del Pueblo, carecen de estos honores y tal vez de la justicia en sus causas, por vincular las varas en esta misma conformidad".<sup>2767</sup>

Ponía también de relieve Arce y Bustillos que todos estos señores Allende "...son los más distinguidos en caudal en esta ciudad, y que tienen entre sí el mayor comercio della, que es el de las mulas".<sup>2768</sup> Por lo cual era natural concebir, para Arce y Bustillos, "...que para sostener este [comercio] con los adelantamientos [fiados en el pago de la sisa y la alacabala] que se prometen procuren [los Allende] estos oficios para el mayor respeto de sus Personas".<sup>2769</sup>

Pero para enfrentar las prácticas centralizadoras de las autoridades virreinales las elites oligárquicas o patriciados de los Cabildos del interior del espacio colonial recurrieron, en la defensa de su propia legitimidad, a la manipulación del derecho consuetudinario así como también la sátira literaria. El influjo consuetudinario en el derecho indiano se percibía, a juicio de Tau Anzoátegui (1987), no sólo en el gobierno eclesiástico, el Real Patronato, las encomiendas, y los diezmos y los tributos, sino también en el gobierno y la administración seculares. En esta última, los elementos consuetudinarios se advertían también no sólo en las regalías del rey, los despachos de cédulas y bulas, el ceremonial, la recepción y juramento de los virreyes, el salario de los corregidores, y la actividad de la Contaduría Mayor y los oficiales de la Real Hacienda, sino a su vez en la elección de los propios alcaldes ordinarios.<sup>2770</sup> Para dirimir el resultado de elecciones capitulares cuya legitimidad era cuestionada dichas elites esgrimieron el pensamiento de Castillo de Bobadilla,<sup>2771</sup> y de Solórzano y Pereira;<sup>2772</sup> para quienes la fuerza de la costumbre estaba encarnada en los casos históricos comparados.<sup>2773</sup> Es con motivo de las elecciones capitulares de Córdoba de 1778 que --al producirse la quinta crisis de relevancia política en lo que iba del siglo-- se puede advertir claramente el rol vital jugado por el derecho consuetudinario en la resolución de los conflictos suscitados en contiendas electorales capitulares. La mayoría del Cabildo de Córdoba, controlado en 1780 por los regidores propietarios José y Santiago de Allende y Losa, y su sobrino segundo José Antonio de Allende y Argüello,<sup>2774</sup> rechazaba la denuncia del Alguacil Mayor García Guillello alegando que el índice alfabético de las Provisiones Reales por él citado no hacía fe por estar ilegible, y que por ende había que estarse al Derecho Común "...que permite puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".<sup>2775</sup> Según dicha mayoría concejil, en los textos jurídicos anteriores a la Real Provisión citada, como la Curia Filípica,

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros, padre por hijo, de cuio tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".<sup>2776</sup>

Más aún, aunque hubiere sido cierta la Real Provisión citada, el Fiel Ejecutor José de Allende y Losa, alegaba que "...estaría derogada por la inmemorial costumbre que se ha observado en esta ciudad, comprobada con innumerables actos de esta naturaleza que tienen fuerza de ley".<sup>2777</sup> En apoyo del argumento de la mayoría del Cabildo de Córdoba, José Prudencio Jixena,<sup>2778</sup> profundo conocedor de la historia de cada una de las Gobernaciones, citaba en 1780, como jurisprudencia o precedentes a favor de la familia Allende,<sup>2779</sup> los casos de nepotismo de los hermanos Echenique y Las Casas en Córdoba, los López de Velazco en Santiago del Estero,<sup>2780</sup> los Aráoz en Tucumán,<sup>2781</sup> los Martínez de Yriarte en Jujuy,<sup>2782</sup> los Nieva en Catamarca,<sup>2783</sup> los Villafañe en La Rioja,<sup>2784</sup> y los Arias y los Cornejo en Salta.<sup>2785</sup>

Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula sobre la alternativa, se había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al patricio Dalmacio Vélez,<sup>2786</sup> quien se arrogó el título de Justicia Mayor,<sup>2787</sup> y como Alcalde de segundo voto al peninsular José del Portillo,<sup>2788</sup> ambos ligados por afinidad política a la Compañía de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique. El resultado de estas elecciones fue confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González, marido de Clara Echenique y Urtubey.<sup>2789</sup> Esta confirmación, que perjudicaba las ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>2790</sup> así como las de sus socios, los hermanos José Allende y Losa,<sup>2791</sup> y Santiago Allende y Losa,<sup>2792</sup> ambos aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,<sup>2793</sup> se convirtió en fuente de una nueva crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.<sup>2794</sup>

El patriciado cordobés era, si nos atenemos al Cuadro F-B antes mencionado, cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba en 1782 el comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,<sup>2795</sup> que en Córdoba escaseaban, como en La Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".<sup>2796</sup>

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico, semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quiso sin éxito desmembrar.<sup>2797</sup> En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de patricios y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta Municipal de Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y el derecho de administrar la Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de usufructuar los fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende logró sin oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,<sup>2798</sup> y a Domingo Ignacio de León;<sup>2799</sup> para 1776 a Santiago de Allende y a Marcelino Moyano;<sup>2800</sup> para 1777 a Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,<sup>2801</sup> "...quien dirigido por el Sargento Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados sistemas como lo tenían bien

previsto cuando lo eligieron".<sup>2802</sup> Recaía en ese entonces, año de 1778, en el Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>2803</sup> comisionado por el Teniente Gobernador Arriaga, la responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre Benítez,<sup>2804</sup> y al Europeo Nicolás Azcoeta,<sup>2805</sup> electos por el Alguacil Mayor Nicolás García Guilleo,<sup>2806</sup> y el Alcalde Provincial Domingo de Garay.<sup>2807</sup> Para impedir esta confirmación estaban las cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa (Ver Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo de Córdoba, en 1778-80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba legitimar la hegemonía violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia conciliatoria fundada en una concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de juicio la unidad del discurso oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.<sup>2808</sup>

En Córdoba, en 1780, el Alcalde José Antonio de Allende y Argüello,<sup>2809</sup> conjuntamente con sus tíos segundos los hermanos José y Santiago Allende y Losa, pretendían elegir a su sobrino carnal Don Francisco de Armesto, hijo natural de María de Allende y Losa,<sup>2810</sup> cuya compleja y clave descendencia para la historia política de Córdoba podemos observar en el Cuadro COR-III. Para lograr colocar a su sobrino, dichos hermanos alegaron que sobre el candidato opositor, Juan Tiburcio de Ordóñez, pesaba la tacha de haber sido ya recusado por el Cabildo de Córdoba en Noviembre de 1772, con el agravante de haber sido ésta recusación admitida por la Real Audiencia de la Plata.<sup>2811</sup> Concurría en Ordóñez, según los Allende,

"...el defecto de ser de los más inquietos y sediciosos de esta ciudad [Córdoba], y la reprehensible circunstancia de tener vinculada su congrua en la dirección de los jueces, y accesoria de las partes, vendiendo la justicia a los que más dan, como se comprueba de tres cuerpos de autos".<sup>2812</sup>

El mismo carácter de Ordóñez tenía, según los Allende, el Alguacil Mayor Guilleo, "...a quien por su inquietud y codicia, por su genio sedicioso, apellida el público con el apodo de tinterillo".<sup>2813</sup> No es de extrañar que para los Allende, Guilleo fuera "inquieto", pues el 3 de febrero de 1779 solicita "...se le manden restituir los derechos que percibía como Alguacil Mayor de Cajas por las Tropas de Carretas y Arrias que salían de aquella ciudad".<sup>2814</sup> La mala fé del Cabildo de Córdoba en pretender cobrar dichos derechos con destino a las obras públicas se revelaba, para Guilleo, cuando era "...omiso en recaudar el real por mula" concedido para dichas obras.<sup>2815</sup>

También guardaba la misma caracterización que a Guilleo y Ordóñez le habían asignado los Allende, Don Juan Antonio de la Bárcena,<sup>2816</sup> pues el 11 de septiembre de 1779 Don José de Allende y Losa "...acompaña testimonio de los acuerdos celebrados para recibir el nuevo Tesorero que nombraron los Oficiales Reales en lugar de Carlos Estela, por donde consta el genio inquieto de Juan Antonio de la Bárcena".<sup>2817</sup> Tres meses después, en Diciembre de 1779, cuando con ocasión del socorro solicitado por Buenos Aires para afrontar la amenaza portuguesa, Bárcena se hallaba aprontando 300 hombres, el Gobernador libró comisión para arrestarlo, medida que puso en ejecución el Alcalde de Primer Voto General José de Allende y Losa.<sup>2818</sup> Con el pretexto de la apelación ante la Real Audiencia la trenza o contubernio de los Allende se opuso al recibimiento de Ordóñez, desobedeció al Gobernador Arriaga, y en el acuerdo del día siguiente eligió --según manifiestan Nicolás García Guilleo y Domingo Garay-- "...por pluralidad de votos, si acaso merece este nombre la confederación de los de una familia", para Alcalde de

Primer Voto al Dr. Domingo Ignacio de León, y para Alcalde de Segundo Voto a Don Francisco de Armesto y Allende.<sup>2819</sup> León se hallaba de Presidente en la Junta de Temporalidades, "...sujeto a las cuentas que debe dar de sus asuntos y caudales, y sin haber dado residencia del empleo de Alcalde de Segundo Voto, que ejerció en 1775".<sup>2820</sup> En tanto Armesto y Allende, "...entenado de Don Gregorio Arrascaeta y sobrino de muchos de los que lo eligieron" se hallaba con causa criminal pendiente, "...y sus bienes embargados por las tropelías que ejecutó contra Doña Francisca Fernández, primera mujer del Alferez Real Don Juan Antonio de la Bárcena".<sup>2821</sup> En otra carta dirigida al Virrey un año después, en 1779, el Alguacil Mayor Guilleddo y el Alcalde Provincial Domingo Garay le informan que por Alcalde de Primer Voto han elegido al Coronel Francisco Antonio Gonsález,<sup>2822</sup> y "...para atraer a los demás Regidores a una concordia que dictava la equidad, la prudencia y la razón",<sup>2823</sup> eligieron por Alcalde de Segundo Voto a un nuevo miembro de la Casa de los Allende, aunque hijo de quien en el pasado se había enfrentado a dicha familia, que lo era Don Nicolás de Cabrera Ceballos.<sup>2824</sup> Sin perjuicio de sus actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un fuerte giro mercantil, alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y Buenos Aires por valor de \$286.327.<sup>2825</sup> La mencionada concordia se extendió también a la vida privada, pues para 1779 el ex-Alcalde Armesto y Allende, luego de su traspie con la primera mujer de Bárcena, habría encarrilado su vida casándose con la hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay.

Al año siguiente, en 1780, luego de la defección de Garay, García Guilleddo debió sumar a su facción al Juez Comisionado Don Juan López Cobo,<sup>2826</sup> y al Regidor Juan Antonio de la Bárcena, de resultas de la cual logró consolidar una parcialidad que ponía en tela de juicio la legalidad del mecanismo eleccionario adoptado por la mayoría.<sup>2827</sup> Como corolario de su posición, la mayoría del Cabildo eligió en 1780 a un pariente de los Allende y a un rico comerciante bien emparentado. En efecto, la Alcaldía de primer voto recayó en Francisco José de Uriarte,<sup>2828</sup> que aunque relativamente pobre y haber sido acusado en 1769 de contrabandista, era con cuñado de Santiago de Allende y Losa,<sup>2829</sup> y la de segundo voto en el comerciante Bernavé Gregorio de las Heras.<sup>2830</sup> Este último, como puede observarse en el Cuadro COR-VII, se caracterizaba por ser con cuñado del comerciante peninsular Jacinto Díaz de la Fuente, del hacendado y comerciante Felipe Antonio Gonsález,<sup>2831</sup> y del Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes Don Rafael María Castellanos y Cossio.<sup>2832</sup> Gregorio de Las Heras contaba con un intenso giro comercial que se extendía desde Buenos Aires hasta Salta, extremos por donde viajaba asiduamente, y en cuyos Cabildos su opinión también contaba.<sup>2833</sup>

No obstante los argumentos de la mayoría y pese a hallarse en inferioridad numérica Guilleddo planteaba que la asistencia simultánea de padres, hijos y hermanos en los Cabildos "...no era una costumbre legítima sino corruptela".<sup>2834</sup> La fórmula elegida en esta ocasión por Guilleddo, López Cobo y Bárcena, y recaída en el Teniente Coronel Torre Benítez, y en el Sargento Mayor Gaspar de Salcedo, aunque derrotada, fué formulada al decir de López Cobo "...sin otra preocupación que el de que florezca la justicia, se extirpen los vicios y respire el público de este vecindario que por tantos años gime bajo el yugo de las casas de Arrascaeta y los Allende".<sup>2835</sup> Según el Comisionado Juan López Cobo, los empleos concejiles fueron erigidos "...para honrar a los vecinos beneméritos de los pueblos más no para perpetuarse y vincularse en una sola casa, familia o bando".<sup>2836</sup> Tanto Bárcena como López Cobo eran fuertes comerciantes, cuyo giro comercial se originaba en el crédito con que contaban entre los comerciantes porteños. Bárcena había alcanzado a operar una media docena de veces en un período que arrancando en 1748 se había

extendido por medio siglo hasta 1790, sumando un total de \$16.470,<sup>2837</sup>; y López Cobo había contraído entre 1761 y 1773 una veintena de transacciones, totalizando un capital de \$143.346.<sup>2838</sup>

Dos años después, en 1782, Carlos Estela, amigo del impugnado candidato a Regidor José de Ariza,<sup>2839</sup> al igual que en 1776 lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo,<sup>2840</sup> delata la situación imperante en el Cabildo de Córdoba como un grave caso de nepotismo. Esta situación se reflejaba automáticamente en los ingresos fiscales del Ayuntamiento Cordobés, manifestados en los autos obrados por la Diputación del Cabildo acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".<sup>2841</sup> Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilleto, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado (defraudado) a los Propios este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente están empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".<sup>2842</sup>

Como era de suponer, Estela había sido excluido y separado por los demás Oficiales Reales del manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la Intendencia de la Real Hacienda. Impuesto del hecho, el Teniente Gobernador Arriaga no sólo lo declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de reposición.<sup>2843</sup> El Cabildo compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don José de Allende y Losa y Don Francisco Hurtado de Mendoza,<sup>2844</sup> resistió su reposición, no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela ofreciera. Pero el caso era que en aquel Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los Tribunales superiores".<sup>2845</sup> Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, Santiago, y José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el Alcalde de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos,<sup>2846</sup> casados estos últimos con dos hermanas hijas del finado General Tomás de Allende y Losa,<sup>2847</sup> y sobrinas carnales en primer grado de los dos primeros regidores mencionados. Asimismo componían dicho Cabildo el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz,<sup>2848</sup> consuegro de un tío de las esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; un conuñado de Allende, el Procurador General de la Ciudad Don Francisco José de Uriarte; y los regidores Don José Prudencio Xixena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del cuarto grado, unos por afinidad [matrimonio] y otros por sanguinidad y parcialidad".<sup>2849</sup> Como se comprenderá

"...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque ellos tienen, puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de aquella Ciudad, anualmente se ve entrar y salir todo el mando y poder de aquella ciudad de unos parientes en otros, entre ellos turna y entre sus manos se gastan las varas, mas no se atienden las resoluciones del Soberano".<sup>2850</sup>

A comienzos de la década del 90, la casa de los Allende, encubierta bajo el manto de sobremontista, y pese a la oposición de la facción funesista, seguía en el control del Cabildo. Para 1788 se eligió por Alcalde de segundo voto al Coronel de Milicias Antonio

del Castillo,<sup>2851</sup> para 1789 a Francisco Antonio Gonsález por Alcalde de primer voto,<sup>2852</sup> y al Dr. Victorino Rodríguez por alcalde de segundo voto;<sup>2853</sup> para 1790 a Victorino Rodríguez y a Don Antonio de la Quintana y Sebreros respectivamente;<sup>2854</sup> para 1791 a Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo,<sup>2855</sup> y a Don Antonio del Castillo; y para 1795 a José de Isasa y Ayesta.<sup>2856</sup> En el año del siglo 1800, se vuelven a reiterar los abusos electorales, lo cual hizo decir al Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,<sup>2857</sup> un miembro del grupo funesista, que en el Cabildo de Córdoba se verificaba a fines de siglo el tesón sistemático de

"...radicar los empleos consejiles en casa de los Allendes, y por esto eligieron para Alcaldes a Don Cipriano Moyano [y Quijano, casado con María Dolores Porcel de Peralta, primo hermano de Catalina Moyano y Cabrera, mujer del Regidor José Antonio de Allende Argüello], por Regidores a José Manuel Allende, hijo de Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo, Caballero de la Orden de Carlos III, y sobrino segundo del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, a un hermano político de éste Don Francisco Gache [y Escajal, casado con Ursula de Allende y Mendiolaza], a Don José Ignacio Mujica [hijo de Miguel Antonio Mujica y de María Quiteria Usandivaras y Losa], primo hermano del actual Alcalde de segundo voto Mariano Usandivaras y Allende [el cual a su vez era sobrino carnal de la mujer del Coronel Allende], y al Dr. José Dámaso Xigena [sobrino segundo de José Prudencio Xigena], preceptor que fué en latinidad de los hijos del finado Pedro Lucas de Allende".<sup>2858</sup>

Y en oportunidad de elegir en 1800 al Defensor General de Menores, el Alcalde Mayor Provincial Arredondo, expuso que el Alcalde de primer voto Pedro Lucas de Allende

"...deberá excluirse de las presentes elecciones por hallarse actualmente sustentando un ruidoso o interesante litigio en esta ciudad con el Sr. Regidor Defensor General de Menores [Francisco Antonio Bulnes], a quien S.A. lo ha nombrado, para que promueva los derechos de los hijos del finado Don Benito Antonio de Allende [su hermano], sobre crecida cantidad de pesos, que le demandan".<sup>2859</sup>

Por este motivo, alegaba Arredondo, "...no puede ocultarse a Usía el interés que debe acompañar al expresado Sr. Alcalde para la elección de un Defensor parcial, o que no le prometa contradicción formal en el curso de dicho pleito".<sup>2860</sup> Si la Ley 34, título 6, Libro 3 de las de Ordenanzas de Castilla ordenaba que todo capitular, cuando en el Acuerdo que se va a celebrar ha de tratar de su persona e intereses, debe salir del Ayuntamiento, con más razón en este particular caso. Parecía entonces, que por esta causa "...deberá ser excluido el dicho Sr. Alcalde [Pedro Lucas de Allende], pues se va a nombrar un sugeto [Defensor de Menores], que inmediatamente deberá tocarle sobre los intereses litigados en la citada causa".<sup>2861</sup> También debía ser excluido del acto eleccionario, a juicio de Arredondo, el Señor Regidor Defensor de Pobres Juan Antonio Cabrera y Allende,<sup>2862</sup> así porque

"...contra éste gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de primer voto, pues es del propio modo interesado en el nominado litigio, ...porque es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado prohibido para votar por la Ley 35, Título 2, Libro 2 de la Novísima Recopilación".<sup>2863</sup>

Por el contrario, en ocasión de las elecciones de 1801, si bien los dos elegidos fueron Dalmacio Allende Moyano,<sup>2864</sup> y José Manuel Allende y Torres,<sup>2865</sup> el Cabildo se declaraba --en oficio dirigido al Virrey-- satisfecho por cuanto los elegidos "...no son parientes a no ser en el octavo o décimo grado".<sup>2866</sup> Pero precabiendo que el Virrey fuera informado que Dalmacio Allende era asimismo pariente del electo Alcalde de primer voto Cipriano Moyano, el Cabildo de Córdoba se adelantaba para aclararle "...que aquel parentesco está fuera del cuarto grado, y llega al quinto, pues el Don Dalmacio es hijo de una prima de Don Cipriano".<sup>2867</sup>

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue sólo la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal, que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

## Capítulo I-H-29      **Cuotas exógenas y endógenas en las recusaciones capitulares.**

### Índice

ZZ-I    Impacto de la *alternativa*.

ZZ-II   Disputas entre patricios y peninsulares. El caso de Córdoba.

ZZ-III   Pactos o concordias.

### **Introducción del capítulo I-H-29**

En el mundo colonial hispánico, diversos mecanismos --tales como la *alternativa*, el nepotismo, la limpieza de sangre, el tanteo, el retracto, los fueros, el régimen capellanico, etc.-- otorgaban privilegios que beneficiaban a distintos grupos sociales según su relativa correlación de fuerzas. En efecto, por el proceso político de la *alternativa*,<sup>2868</sup> cualquier español peninsular podía, al momento de las elecciones capitulares, reclamar el derecho a ser elegido para una alcaldía. La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares --conocida como la *alternativa*-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a visualizar a los peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la *alternativa*,<sup>2869</sup> sometió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa.<sup>2870</sup>

### **ZZ-I    El impacto de la *alternativa*.**

En principio, el impacto de la *alternativa* variaba notablemente de una provincia a otra, según la diferente proporción de población peninsular existente. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.<sup>2871</sup> Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.<sup>2872</sup>

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión inmigratorio varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este último ranking fue elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad de provincia escasa de varones españoles adultos casados.

En ese sentido, en aquellas provincias donde se contaba con abundancia de vecinos peninsulares la cuota de representación política privilegiada no era visualizada como una injusticia. El caso extremo fué Buenos Aires, donde la presencia de peninsulares era abismal, y la de los vecinos criollos considerada como una minoría. En consecuencia, en Buenos Aires la cuota privilegiada debió haber sido reclamada por los criollos.

## **ZZ-II Disputas entre patricios y peninsulares. El caso de Córdoba.**

El caso de Córdoba es el de una provincia donde la presencia de ambas nacionalidades se equilibraba. Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula sobre la alternativa, se había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al patricio Dalmacio Vélez,<sup>2873</sup> quien se arrogó el título de Justicia Mayor,<sup>2874</sup> y como Alcalde de segundo voto al peninsular José del Portillo,<sup>2875</sup> ambos ligados por afinidad política a la Compañía de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique, heredera del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera. El resultado de estas elecciones fue confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González, marido de Clara Echenique y Urtubey.<sup>2876</sup> Esta confirmación, que perjudicaba las ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>2877</sup> así como las de sus socios, los hermanos José Allende y Losa,<sup>2878</sup> y Santiago Allende y Losa,<sup>2879</sup> ambos

aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,<sup>2880</sup> se convirtió en fuente de una nueva crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.<sup>2881</sup>

El patriciado cordobés era, si nos atenemos al Cuadro F-B antes mencionado, cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba en 1782 el comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,<sup>2882</sup> que en Córdoba escaseaban, como en La Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".<sup>2883</sup>

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico, semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quizo sin éxito desmembrar.<sup>2884</sup> En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de patricios y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta Municipal de Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y el derecho de administrar la Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de usufructuar los fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende logró sin oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,<sup>2885</sup> y a Domingo Ignacio de León,<sup>2886</sup> para 1776 a Santiago de Allende y a Marcelino Moyano,<sup>2887</sup> para 1777 a Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,<sup>2888</sup> "...quien dirigido por el Sargento Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados sistemas como lo tenían bien previsto cuando lo eligieron".<sup>2889</sup> Recaía en ese entonces, año de 1778, en el Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>2890</sup> comisionado por el Teniente Gobernador Arriaga, la responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre Benítez,<sup>2891</sup> y al Europeo Nicolás Azcoeta,<sup>2892</sup> electos por el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,<sup>2893</sup> y el Alcalde Provincial Domingo de Garay.<sup>2894</sup> Para impedir esta confirmación estaban las cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa (Ver Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo de Córdoba, en 1778-80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba legitimar la hegemonía violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia conciliatoria fundada en una concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de juicio la unidad del discurso oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.<sup>2895</sup>

Pero fracasada la implementación de la alternativa,<sup>2896</sup> como mecanismo utilizado por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus hijas con españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos funcionarios que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el parentesco de los gobernantes.<sup>2897</sup>

### **ZZ-III Los pactos o concordias.**

También se dieron entre los diversos clanes de los patriciados provinciales numerosos pactos o concordias para impedir la aplicación en sus distritos el régimen de la

alternativa. En La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán y los Villafañe celebraban su unidad practicando concordias. Primero en 1708 y setenta años después, en 1781, con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado Riojana firmó concordias, donde acordaba su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.<sup>2898</sup> Si bien tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba. Este cambio de jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de la provincia, marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú y con Chile. Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y minera en manos de una élite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo.

Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán de Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando en 1781 una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.<sup>2899</sup> En esta unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que detallamos en los Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el mando.

Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila, perteneciendo a las mismas la riojana Felipa Tagle y Castro, la cual se desposara con el Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de soldados a Manuel José Derqui,<sup>2900</sup> yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,<sup>2901</sup> y como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.<sup>2902</sup> La Casa de los Villafañe llegó a incorporar a fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,<sup>2903</sup> Manuel del Rincón y Escudero,<sup>2904</sup> y Favián González,<sup>2905</sup> uno de los Administradores particulares designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,<sup>2906</sup> quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortiz de Ocampo en 1794.<sup>2907</sup> Quien por primera vez enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al extremo de ser repetidamente impedido de ingresar al Cabildo, fue el Administrador General de Tabacos, Don José Antonio Mercado,<sup>2908</sup> pariente de la mujer de Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.<sup>2909</sup> No obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una profunda enemistad originada en su desempeño como Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y en el pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y Castro le seguía por las tierras de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.<sup>2910</sup> Amén de Ocampo, el Alcalde Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una profunda inquina, al extremo de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo que "vendía malos tabacos".<sup>2911</sup>

Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se sumaron al bloque oficialista Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y Dávila.<sup>2912</sup> Sin embargo, estos dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de ser parientes dentro del tercer grado de afinidad.<sup>2913</sup> Finalmente, Mercado fué arrestado bajo la injusta acusación de haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle.<sup>2914</sup> A más de haber abandonado el relevo, Mercado fue acusado también de haber esquilmo a sus soldados con el juego y la venta de bebidas espirituosas.<sup>2915</sup> En realidad, las tropas fueron sublevadas por el Comandante Juan José de Villafañe y Dávila,<sup>2916</sup> "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo compuesto de sus allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".<sup>2917</sup> Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe apareciese como de Mercado.

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue sólo la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal, que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

## **Epílogo Sección I-H**

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

Y sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo XVIII aquí relatados, podemos afirmar que lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue sólo la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de

oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal, que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

## **Sección I**

### **Capítulo I-I-30                      Conclusion del Tomo-I**

Los órdenes prehispánico e imperial-absolutista adquirieron en el Río de la Plata connotaciones muy peculiares y muy distintas de las que caracterizaron al resto del dominio español. Desde sus orígenes, dicho orden en el Río de la Plata se caracterizó por ser el eslabón débil de la dominación absolutista en el mundo colonial al ser la puerta de entrada del pensamiento heterodoxo erasmiano y al contar con una desmedida impronta del capital comercial y con las consiguientes políticas mercantilistas, acompañadas por media docena de sub-órdenes, tales como el barroco, el estamental, el señorial, el patrimonial, el corporativo y el nepótico.

Teniendo en cuenta que Buenos Aires era sólo un vínculo intermedio en el gran circuito triangular que articulaba Sevilla con Loanda (Angola) y Potosí (Alto Perú) podemos concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en Buenos Aires en el siglo XVII a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado externo (contrabandistas de esclavos y de plata en piña) y productores orientados al mercado interno, muchos de los cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos, cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto crónico para obtener hegemonía.

Hemos verificado como la naturaleza contradictoria del estado colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho estado, que se estructuraba a sí mismo en relación a los constreñimientos económicos, sociales y políticos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en relación subordinada al estado superior español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y el Consejo de Indias) y la red intérlope Portuguesa, e internamente en relación con la sociedad civil y política local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado; por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías y cofradías, y miembros del Cabildo Eclesiástico). La forma peculiar de estructurar su propia naturaleza contradictoria marco el antecedente histórico más importante y remoto del colapso del orden colonial-absolutista.

Para resumir, concluimos a partir de la evidencia incorporada en este tomo que, a diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de Buenos aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de

tierras, se casaron con mujeres criollas y se involucraron en la política local. Además, a diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes portugueses en Buenos Aires no experimentaron ningún tipo ostensible de persecución religiosa, aunque la amenaza potencial de la Inquisición de Lima nunca dejó de existir. Dada esta movilidad económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa en Buenos Aires en el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una posición intermediaria a una dominante, así como por qué evitaron siempre una estrategia de diferenciación nacional.

También, hemos verificado como la penetración colonial en la campaña de Buenos Aires bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambió los patrones culturales, de una producción de pequeña mercancía, administrada por la facción Benemérita, hacia una producción agraria en gran escala, orientada al mercado, administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, en este tomo se ha demostrado que para estimular una estrategia de producción en gran escala una clase terrateniente no-encomendera de empresarios debió recurrir a la adquisición de tierra pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda portuguesa de vituallas.

Y un siglo más tarde, a fines del XVIII, la fragmentación social subsistente entre los mercaderes asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios la mayor parte de la población mercantil activa estaba discriminada de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado y en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

En cuanto a la esclavitud, ésta actuaba como una de las condiciones restrictivas que impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.<sup>2918</sup> Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.<sup>2919</sup> Pero esto no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces

impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud estipendiaria.

En suma, hemos mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al mundo comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los mercaderes de Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de formación de una fuerza de trabajo colonial, así como la articulación de Buenos Aires con su propio *hinterland*. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los encomenderos del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el trabajo indígena de las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos en su nuevo establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían acostumbrado a cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo donde migrar.

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña.

Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.<sup>2920</sup> Asimismo, la escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre en el Río de la Plata, presidió el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra (papeleta de conchavo).<sup>2921</sup> La escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.<sup>2922</sup> La extrema fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos -- tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.<sup>2923</sup> La centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias y la existencia de instituciones como los derechos de abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados) condicionó el desarrollo de los mercados inmobiliarios urbano y rural. La proliferación de capellanías y censos en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

En materia de crédito y circulación mercantil, reconocemos en la primer parte del siglo XVII, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Y en el siglo XVIII, una vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a estar directamente ligada al mercado mundial, como en la primera mitad del siglo XVII, descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de desarrollo mercantil.-absolutista. En este período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981, 1985), y repetido

por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al período que lo precedió.<sup>2924</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue el más significativo de todos, no ha merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.<sup>2925</sup>

Si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; sobre la base de las numerosas listas, cuadros y apéndices hemos concluido que la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, y había logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

En materia del mercado interno local, y específicamente con relación a los mercados inmobiliarios, podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores más tradicionales. Y en materia del mercado inmobiliario rural, si bien la perpetuidad y la consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, vulnerando la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí exhibidas, que si bien la inestabilidad social colonial, expuesta en los altibajos de la encomienda, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social -- expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

En cuanto a la construcción de un enclave minero, hemos constatado que el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada

capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores y horneros). La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta en el negocio minero debía contemplar no sólo los costos de producción sino también los costos de inventario. Estos últimos comprendían la diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba que los stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora, velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto.

La expansión mercantil tuvo su necesario derivado en la conformación de la burocracia colonial y en la gestación de los sub-órdenes patrimonial, corporativo y nepótico. Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso patrimonializador del estado colonial se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.<sup>2926</sup> Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa, y elitista por el otro, al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra. Finalmente, la Milicia habría participado también fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. Ella habría sido también la única que logró generar un inusitado proceso de movilidad social ascendente de las capas y grupos marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por la arbitrariedad y el clientelismo. Era entonces natural que de ello derivara un caos más o menos prolongado, que alimentó los resentimientos que precipitaron la revolución de independencia.

En cuanto al Real Consulado de Comercio, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo.

Podemos afirmar también, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos

la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,<sup>2927</sup> y quienes dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.<sup>2928</sup> Asimismo, podemos concluir, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

En conclusión, podemos aseverar, fundados en los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo XVIII aquí relatados, lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

## **Tomo II Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del mundo colonial (Río de la Plata-siglo XVIII).**

### **INDICE del Tomo II**

#### **Introducción**

**Sección II-A Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y fatuamente “universal”**

**Sección II-B Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista**

**Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal.**

**Sección II-D Fragmentación gremial del orden monopolista**

**Sección II-E Descomposición social del orden esclavista.**

**Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista**

**Sección II-G Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial**

**Sección II-H Rebeliones de originarios, crisis militar, y cuestionamiento del orden corporativo**

**Sección II-I Acortesanamiento indiano y denuncia del orden nepótico**

#### **Abstract del Tomo II**

## **Sección II-A Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y fatuamente “universal”**

### **Capítulo II-A-1**

Analogías históricas garcilacistas, reformismo despótico-ilustrado (Borbónico) y políticas anti-jesuíticas (1748-1784) 23

### **Capítulo II-A-2**

Clivajes ideológicos (escolásticos-humanistas-iluministas) y gestación de una esfera pública. 22

### **Capítulo II-A-3**

Grietas discursivas, fracturas literarias y acciones colectivas contra el barroquismo colonial (1764-1810) 34

### **Capítulo II-A-4**

Brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios. 19

## **Sección II-B Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista**

### **Capítulo II-B-5**

Régimen capellánico y pautas patriarcales de la primogenitura y la varonía 26

### **Capítulo II-B-6:**

Conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial. 17

### **Capítulo II-B-7:**

Fisuras entre el clericalismo del fuero eclesiástico y el orden regalista (Patronato Real) 20

## **Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal**

### **Capítulo II-C-8:**

Ilegitimidad, 'Limpieza de Sangre' y crisis del orden dinástico-estamental 24

### **Capítulo II-C-9:**

Estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y eclesiásticas 15

## **Sección II-D Fragmentación gremial del orden monopolista**

### **Capítulo II-D-10:**

Movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil. 16

### **Capítulo II-D-11**

Antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia 7

## **Sección II-E Descomposición social del orden esclavista**

Capítulo II-E-12	
Fuga esclava y resistencia rutinaria y cotidiana	22
Capítulo II-E-13	
Cimarronaje, bandolerismo y mito de la docilidad esclava	21

## **Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista**

Capítulo II-F-14	
Crisis del enclave minero y agremiación de azogueros en el Alto Perú.	22
Capítulo II-F-15	
Desequilibrio del intercambio y economía de trueque	15
Capítulo II-F-16	
Crisis agraria colonial y Real Renta de Tabaco	17
Capítulo II-F-17	
Crisis pecuaria colonial y origen de un régimen predatorio o “desarreglo de los campos”	17
Capítulo II-F-18	
Colapso del <i>entrepôt</i> mercantil y lucha en el <i>hinterland</i> contra el monopolio comercial	12

## **Sección II-G Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial**

Capítulo II-G-19	
Fracturas fiscales, y descomposición de una burocracia subordinada.	27
Capítulo II-G-20	
Extorsiones y sobornos en la conducción de caudales de Potosí a Buenos Aires	24
Capítulo II-G-21	
Corrupción administrativa y nacimiento de una burguesía comercial	23

## **Sección II-H Rebeliones de originarios, crisis militar, y cuestionamiento del orden corporativo**

Capítulo II-H-22	
Contradicciones entre el fuero militar y el poder político.	15
Capítulo II-H-23	
Crisis castrense y resistencia a reprimir en la disputa entre Comandantes de Armas y una burocracia subordinada (Gobernadores y Corregidores)	25

## **Sección II-I Acortesanamiento indiano y denuncia del orden nepótico**

### **Capítulo II-I-24**

Cortesanismo palaciego y endogamia en los cabildos del interior del Virreinato (1760-1790) 24

### **Capítulo II-I-25**

El nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales  
7

### **Capítulo I-I-26**

Cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense. 8

### **Capítulo I-I-27**

Acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial. 8

## **Sección II-J**

Capítulo II-J-28	Conclusión	4
Total de páginas		386

## **Capítulo 0 Introducción del Tomo-II**

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de Utrecht (1713), y reforzado el orden imperial-absolutista a partir del ideario Iluminista y las estrategias re-colonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas (1767-1794), se pudo concebir una más intensa complejidad del estado subordinado o colonial. Esta intensificación de la complejidad en la subordinación de los territorios que constituyeron antaño el Virreinato del Perú y luego el antiguo Virreinato del Río de la Plata y las denominadas Gobernaciones-Intendencias aceleraron las contradicciones políticas al extremo que cuando se produjo la invasión napoleónica a España (1808) derivó en un tremendo colapso y consiguiente desmembramiento que puede caracterizarse como el precipitado de un largo proceso de metanastasis o desorden interno generalizado.<sup>2929</sup>

A medida que estas crisis o desajustes se fueron acentuando, las contradicciones culturales (literarias, poéticas), políticas (patriarcales, patrimoniales, corporativas, cortesanías), sociales (estamentales, señoriales) y económicas (mercantilistas) que se dieron en el seno de los patriciados se fueron entrecruzando y agravando. Las políticas colonizadoras Habsburgas (Virrey Toledo, 1580; Ordenanzas de Alfaro), las políticas absolutistas, anti-inquisitoriales, recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (Expulsión de los Jesuitas de 1767, Real Ordenanza de Libre Comercio de 1778, Real Ordenanza de

Intendentes de 1782, Real Consulado de Comercio de 1794), y las políticas nacionalistas o nacionalizadoras implementadas a partir de la denominada Revolución de Independencia (1810) fueron des-estructurando y reestructurando demográfica, territorial y culturalmente --mediante guerras, metanastasis, particiones, secesiones y una prolífica política de ingeniería institucional-- las relaciones que mantenían los reinos, los estados, las provincias, las ciudades y los individuos entre sí.<sup>2930</sup> Por ejemplo, los patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.<sup>2931</sup> Las propias nociones de soberanía, población y territorio adquirieron luego de la independencia significados totalmente diferentes de los que poseyeron durante el absolutismo.<sup>2932</sup>

Pero el estudio particular de cada una de estas crisis por sí solas no garantizaría el éxito de la empresa, pues las significaciones imaginarias (barrocas, patriarcales, regalistas, estamentales, patrimoniales, corporativas, monopolísticas, esclavistas, nepóticas y mercantilistas), que operaban como funciones en la compleja realidad histórica del orden imperial-absolutista, son a juicio de Lefort (1990), von Beyme (1995) y Castoriadis (2003), diferenciables o separables sólo “nominalmente y en el vacío”, a los puros efectos del análisis.<sup>2933</sup> Entre las crisis o desajustes políticos, la que más habría incidido en la ruptura y deslegitimación de los imaginarios sociales (estilos poéticos barrocos, privilegios estamentales, fueros capitulares y de nobleza, monopolios mercantilistas, ceremoniales de poder inquisitorial, nepotismo y etno-centrismo capitular, y heredabilidad administrativa), habrían sido las crisis políticas ocurridas en el seno de las instituciones deliberativas o parlamentarias de la modernidad colonial-absolutista (Cabildos).<sup>2934</sup> Los conflictos se habrían manifestado embrionariamente en las luchas del siglo XVII entre las facciones denominadas confederadas (partidarias de la producción orientada hacia el mercado externo), y beneméritas (productores orientados hacia el mercado interno); y en el siglo XVIII entre las facciones sarracenas (pro-jesuiticas) o ministeriales (partidarias de las políticas mercantilistas), y las facciones anti-ministeriales (partidarios de la libertad de comercio, la Expulsión de los jesuitas y la des-jesuitización de las universidades). También se habrían manifestado en los pasquines y las acciones colectivas urbanas desatadas por las alianzas entre sectores de la elite, los gremios y la plebe, por la consecución de objetivos puntuales, por lo general anti-fiscales. Asimismo se habrían manifestado en la fragmentación de la elite mercantil, al asomar una fracción de dicha elite que se disociaba de las casas monopolistas de Cádiz y adquiriría una autonomía propia para comerciar con capital y barcos propios entablando vínculos con otras colonias del mundo conocido.

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse: ¿si las crisis espiritual, cultural, política, económica y social se hallaban o no relacionadas con los procesos de deslegitimación y colapso o crisis terminal del orden imperial-absolutista?; y ¿si devino en mito institucional racional la estructura discursiva de las instituciones culturales y sociales del orden imperial-absolutista, encarnada en los principios ritualizados de la poesía estamental, la arbitrariedad del poder (despotismo inquisitorial), la adscriptibilidad del status (primogenitura, varonía, hidalguía, casta y pureza o limpieza de sangre), la legitimidad dinástica, la representatividad jerárquica (corporativa, clerical, estamental y territorial o vecinal), la patrimonialidad del funcionariado (venalidad capitular) y la reciprocidad penal y/o responsabilidad colectiva, o del chivo expiatorio, o de la llamada "culpa de la inocencia")?.

Para analizar la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por el uso y abuso de analogías históricas, la gestación de estrategias disciplinarias por parte de facciones rivales y las interminables disputas políticas, grietas discursivas, fracturas literarias,

clivajes ideológicos (erasmismo, enciclopedismo, regalismo, probabilismo, fisiocratismo), brechas simbólicas o protocolares (cortesías, rangos y privilegios), fisuras sociales (emergencia de burguesías comerciales autónomas, fuga esclava, cimarronaje y bandolerismo), quiebras mercantiles, crisis mineras, fracturas fiscales y rivalidades clánicas. A los efectos de estudiar todas estas manifestaciones de deslegitimación del orden absolutista, hemos recogido y seleccionado docenas de textos de época hallados en litigios judiciales y fuentes notariales de los siglos XVII y XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

## **Plan del Tomo II**

El tomo II está dividido en nueve (9) secciones, y cada una de éstas en capítulos, totalizando veintiocho (28) capítulos, y más de un centenar de apartados o acápite, donde cada capítulo está identificado con su respectiva notación diferenciada. El tomo comienza con una breve introducción, seguida por la metodología y las fuentes documentales analizadas.

En la primera sección estudiamos el desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y fatuamente “universal”. En la segunda sección estudiamos la conflictividad eclesial y el debilitamiento del orden clerical-regalista. En la tercera sección tratamos las fracturas étnicas y la crisis del orden estamental-patriarcal. En la cuarta sección investigamos la fragmentación del orden monopolista. En la quinta sección estudiamos la descomposición del orden esclavista. En la sexta sección analizamos la ruptura del orden mercantilista. En la séptima sección investigamos la ruina del fisco y la deslegitimación del orden patrimonial. En la octava sección analizamos las rebeliones de originarios, la crisis militar y el cuestionamiento del orden corporativo. Y en la novena sección analizamos el proceso de acortesanamiento indiano y la denuncia del orden nepótico.

La sección primera la componen cuatro capítulos: Analogía histórica garcilacista, reformismo despótico-ilustrado (Borbónico) y políticas anti-jesuiticas; los clivajes ideológicos y la gestación de una esfera pública; las grietas discursivas, las fracturas literarias y las acciones colectivas contra el colonialismo en las provincias del Río de la Plata; y las brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios. El tercer capítulo citado fue escrito en colaboración con el extinto José González Ledo. La segunda sección está compuesta por tres capítulos: el régimen capellánico y las pautas de la primogenitura y la varonía, los conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, y las fisuras entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real. La tercera sección está compuesta por un par de capítulos consistentes en el estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales y las recusaciones capitulares y eclesiásticas, y los privilegios nobiliarios, la legitimidad y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y eclesiásticas. La cuarta sección la conforman dos capítulos, que son la movilidad social en el comercio y el corporativismo mercantil, y los antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia. La quinta sección la integran dos capítulos, que son la fuga esclava, y el cimarronaje y el bandolerismo.

La sexta sección la comprenden cinco capítulos consistentes en la crisis minera y la agremiación de azogueros en el Alto Perú, la crisis de intercambio y la economía de trueque, la crisis agraria colonial y la Real Renta del Tabaco en el Paraguay, la crisis

pecuaria colonial u origen de un régimen predatorio, y la crisis mercantil y la lucha contra el monopolio comercial español en los orígenes de la revolución de independencia. La séptima sección está compuesta por tres capítulos, las fracturas fiscales, las extorsiones y sobornos en la conducción de los caudales y la corrupción de la burocracia colonial Borbónica. La octava sección la comprenden dos capítulos: las contradicciones entre el fuero militar y el poder político, y la crisis castrense en la disputa entre Comandantes de Armas y la burocracia subalterna (Gobernadores y Corregidores). Y la novena sección está compuesta por cuatro capítulos, a saber: el cortesanismo palaciego y la endogamia en los cabildos del interior del Virreinato; el nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales; el cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense; y el acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial.

## **Sección II-A Anti-escolasticismo y dismantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y fatuamente “universal”**

La no resolución en el Río de la Plata de las contradicciones heredadas de los órdenes prehispánico e imperial-absolutista habsburgo, habría estado eminentemente vinculada con las sucesivas crisis espirituales, culturales, sociales, políticas, militares, eclesiásticas y económicas. Entre dichas crisis, las que más habrían incidido en la puesta en cuestión de la dominación colonial habrían sido las crisis espirituales y/o culturales, ejemplificadas en la crisis de la hegemonía inquisitorial y jesuítica.

En la historiografía del colapso imperial español, la de la crisis político-cultural giró tradicionalmente alrededor de las repercusiones secularizadoras y desacralizadoras que el Iluminismo y la Revolución Francesa tuvieron en sus colonias, y en especial alrededor de los episodios desencadenados por la expulsión de los Jesuitas, el debilitamiento del Santo Oficio, y el expansionismo británico (ocupación de Malvinas, Invasiones Inglesas).<sup>2935</sup> Sin embargo, las repercusiones de los órdenes prehispánico e imperial-absolutista habsburgo fueron dejadas de lado. Excepcionalmente, los arqueólogos y los historiadores como Castillero Calvo (1985), Lavallé (1987) y Rivara de Tuesta (1998) han incursionado en las luchas político-intelectuales que se libraron al interior de los mundos prehispánico y colonial habsburgo.

En esta primera sección nos dedicamos a investigar la crisis de un orden o estilo de poder barroco-inquisitorial en cinco sucesivos capítulos. En particular, investigamos la analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del imperio romano; el reformismo borbónico y las políticas anti-jesuiticas; los clivajes ideológicos y la gestación de una esfera pública durante el orden imperial-absolutista; las grietas discursivas, las fracturas literarias y las acciones colectivas contra el colonialismo; y las brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios,

#### Capítulo II-A-1

##### **Analogía histórica garcilacista, reformismo despótico-ilustrado (Borbónico) y políticas anti-jesuiticas (1748-1784)**

23

#### Índice

- A-I Analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del Imperio Romano
- A-II Políticas transformadoras borbónicas y sus correlatos intelectuales y mercantiles
- A-III Lucha política entre los Consulados.
- A-IV Causa escolástico-jesuitica y la polarización de las elites.
- A-V Caso de las provincias del norte.
- A-VI Caso de Córdoba.
- A-VII Partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.
- A-VIII Facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.
- A-IX Condición de extranjero.
- A-X Fundación de un Consulado de Comercio.

#### **Introducción del capítulo II-A-1**

La implementación de nuevas hipótesis a la explicación de la transformación y crisis del orden imperial-absolutista y de la sociedad colonial latinoamericana encuentra graves dificultades. El pasaje del orden absolutista-habsburgo al orden absolutista-ilustrado encuentra en el mundo colonial puntos límites de inflexión constituidos por varios y relevantes fenómenos históricos:

- 1) la ruptura de la unidad dinástica desatada por la Independencia de Portugal (1640), la pérdida de Gibraltar y los dominios europeos y la apertura de los

puertos de América a la trata de esclavos monopolizada por el Real Asiento de Inglaterra mediante la Paz de Utrecht (1713), la caída de Portobello (1742), la apertura del tráfico del Atlántico sur con la Paz de Aquisgrán (1748), la pérdida de la Misiones Orientales a cambio de la Colonia del Sacramento merced al Tratado de Límites con Portugal (1750), y la pérdida de dicha Colonia del Sacramento a manos de los Portugueses con la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1783);

- 2) la implementación de estrategias secularizadoras, contrapuestas por facciones políticas rivales, expresadas con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y la imposición de la Administración de Temporalidades (1768) y la Real Renta de Tabaco y Naipes (1769);
- 3) la centralización e intervención del poder colonial, es decir las Reformas Borbónicas (Reglamento de Libre Cambio, 1778; fundación del Virreinato, 1778; formación de la Administración de Correos; derogación de los Corregimientos de Indios, 1782; imposición de la Real Ordenanza de Intendentes, 1782; y fundación del Real Consulado de Buenos Aires, 1794);

#### **A-I Analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del Imperio Romano**

En la suspirada “monarquía universal” de la dinastía de los Austrias, el imperio o reino de las Indias no fue la natural resultante de la actividad mercantil, como lo fue en sus principios la India británica, ni tampoco derivada de la persecución religiosa como lo fueron las trece colonias norteamericanas. Por el contrario, el imperio español fue el resultado histórico tanto de la conquista guerrera como de los afanes evangelizadores de la Contrarreforma jesuítica y papista. Con el correr de los siglos dicha “monarquía universal” había entrado en crisis, dando lugar a una intensa discusión acerca de la eventual partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español.

En esas discusiones bizantinas se enfrascaron numerosos intelectuales que imaginaron la des-estructuración y reestructuración territorial y cultural --mediante particiones y secesiones-- de nuevos virreinos, capitanías y gobernaciones-intendencias.<sup>2936</sup> El Inca Garcilaso de la Vega en los Comentarios Reales de los Incas y el limeño Pedro de Peralta y Barnuevo en sus diversos ensayos,<sup>2937</sup> --admirador del Ilustrado Fray Benito Jerónimo Feijoo, quien a su vez fue un asiduo lector de los precursores de la Ilustración tales como Bernard Fontenelle y Pierre Bayle y su correspondiente Dictionnaire Philosophique (1697)— vaticinaron por analogía, tomando prestado de la Utopía de Tomás Moro, la partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español.<sup>2938</sup> Para ello, tanto Garcilaso como luego Peralta y Barnuevo siguieron como ejemplo la partición del Imperio Romano y el cisma de la Iglesia de Roma.<sup>2939</sup> Dichas analogías e imitaciones fueron reiteradas por el mismo Simón Bolívar en su Carta de Jamaica,<sup>2940</sup> esta última considerada por Subirats (1994) como uno de los momentos álgidos de la Ilustración Europea, ubicado en los confines geopolíticos de la misma.<sup>2941</sup>

Esta vieja analogía, que fue de cuño renacentista Guicciardiano y Maquiaveliano, debería hoy tener una revisión crítica dada la prolífica literatura que sobre el imperio romano ha tenido lugar en décadas recientes. Dicha literatura ha sido clasificada muy inteligentemente por el joven investigador Alex Colas (2005) en dos corrientes antagónicas: primero aquellos autores que como Mann (1989), Luttwak (1974), Sack (1982) y Whittaker (1994), hicieron énfasis en la economía legionaria y en la territorialidad de la conquista romana; y por otro lado aquellos autores que como Mattern (1999), Millar (1988) e Isaac (1990) pusieron énfasis en las poblaciones conquistadas y no en los territorios. Y entre los que acentuaban la relevancia de las poblaciones conquistadas, estaban aquellos que fundaban el éxito de la conquista en la extensión de la ciudadanía romana, y aquellos otros que lo hacían en la romanización de los pueblos sojuzgados a través de un vasto repertorio de ingredientes culturales (cultos, juegos, teatro, derecho, munificencia y lingua franca).<sup>2942</sup> Estos últimos han sido los que más han dado que hablar, desde Hopkins (1984) quien hizo hincapié en la sacralidad del poder (ritos y ceremonias), hasta Wood (2002) quien últimamente insistió en su universalidad como paradigmático mecanismo de un ininterrumpido expansionismo, tenido por natural y eterno.

Pues bien, la conquista y colonización hispánica de América también cuenta en su haber con investigadores de ambas corrientes de pensamiento, de los que --cultores de la Leyenda Negra-- sostienen que aquella fue el fruto de la espada y el terror inquisitorial; y de los que por el contrario --seguidores de las Leyendas Rosa y Blanca-- han argumentado que la misma fue la necesaria secuela de una participación consensuada tanto de los pueblos originarios como de los indios forasteros, lograda merced al rol desempeñado por la combinación de una serie de factores: la supervivencia de la nobleza originaria, la lingua franca española, las fiestas paganas (carnavales, corridas taurinas), las fiestas religiosas (procesiones), las actividades artísticas (música religiosa, pintura cuzqueña, arquitectura colonial), el juego (riñas de gallos, lidia de toros, juegos de azar), la munificencia (protectorado de indios o naturales, y de menores, pobres y viudas), la litigación indígena, las actividades literarias (teatro, certámenes poéticos), la prostitución, y al poder hipnótico de los rituales practicados en ocasión de efemérides reales o sagradas (bautismos, consagraciones, funerales y aniversarios).<sup>2943</sup> A ello debemos agregar, tal como sostiene Grosso Lorenzo (2004), el impacto de los nuevos medios de transporte y de las ideas e imágenes impresas.<sup>2944</sup>

## **A-II Políticas transformadoras borbónicas y sus correlatos intelectuales y mercantiles**

Las políticas transformadoras borbónicas, que se iniciaron en el Río de la Plata con la implantación del Real Asiento de Inglaterra, o monopolio de la trata de esclavos (1713), y su penetración de inmigrantes heterodoxos; y que continuaron con la apertura del tráfico del Atlántico sur, a raíz de la caída de Portobello (1742), tuvieron su explicación más cabal en el plano de las políticas fiscales.<sup>2945</sup>

En efecto, las políticas fiscales tuvieron un correlato centrifugador en todas las ciudades de las carreras del Perú y de Chile. Este correlato se manifestó en Córdoba, con la polarización producida a raíz de las funciones del Tenientazgo del Rey; y en Buenos Aires, con las oposiciones generadas a instancias del Comandante de la primera Expedición Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de Valdelirios,<sup>2946</sup> así como a raíz de las prisiones provocadas por las denuncias de contrabando,<sup>2947</sup> y de los conflictos generados por la elección de los Diputados Porteños de los Consulados de Cádiz y Lima (1755) y los Diputados provinciales del Consulado de Buenos Aires.<sup>2948</sup> Estas políticas transformadoras se consolidaron en el campo del pensamiento, la expresión literaria, la ideología y las estrategias disciplinarias con la Expulsión de los Jesuitas (1767), y lograron su apogeo administrativo con la Real Ordenanza de Intendentes (1782), las cuales dieron lugar a que se prolongaran alianzas entre parcialidades pertenecientes a ciudades diversas.

Si bien Córdoba contaba con un Cabildo dotado de fuertes tradiciones mercantiles, éste se hallaba dividido por la presencia del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>2949</sup> quien logró capitalizar a su favor a un grueso número de vecinos, detallados en el Apéndice Z-I, y antagonizar a otro numeroso grupo de intransigentes opositores del mismo, integrantes del clan de los Echenique, e íntimamente ligados a las actividades pecuarias en el Desierto del sur de Córdoba, detallados en el Apéndice Z-II.<sup>2950</sup> En cuanto a Buenos Aires, si bien careció hasta 1794 de un Consulado de Comercio propio, contaba con la presencia de Diputados elegidos por los Consulados de Lima y de Cádiz.<sup>2951</sup> En 1755 y 1756, a sugerencia del Gobernador José de Andonaegui y por orden del Virrey de Lima, se celebraron elecciones periódicas de Diputados.<sup>2952</sup> Por votar en ellas peninsulares y vecinos, ambos grupos alegaron el derecho al voto activo y pasivo. A dicho interminable conflicto puso fin el Gobernador Pedro Antonio de Cevallos suprimiendo la discutida magistratura, en perjuicio del Consulado de Lima, motivo por el cual comenzó el distanciamiento entre Cevallos y el Marqués de Valdelirios.<sup>2953</sup>

### **A-III La lucha política entre los Consulados.**

Esta lucha política --primero a mediados de siglo, en las elecciones de los Diputados porteños de los Consulados de Comercio de Lima y de Cádiz, y más luego, a fines de siglo, en las elecciones de Diputados al Consulado de Buenos Aires-- se manifestaba entre todos los comerciantes de la carrera del Alto Perú y de Chile, y reflejaría también las contradicciones por la renta minera misma. A su vez, la lucha por el control del Situado Real (subsidio fiscal remesado por las Cajas Reales mayores a las Cajas Reales subsidiarias de las regiones periféricas), que se manifestaba entre los Diputados del Consulado de Comercio, reflejaría las contradicciones por la renta fiscal entre "burocracias" correspondientes a jurisdicciones administrativas antagónicas.<sup>2954</sup>

El Consulado de Lima tuvo por sus adictos en Buenos Aires y en toda la carrera del Alto Perú y Chile a un poderoso grupo de comerciantes, ligados entre sí con estrechos lazos de parentesco y de intereses políticos y mercantiles, que venía desde hace años lidiando con los Jesuitas y operando en el contrabando con la Colonia del Sacramento, mediante las remesas de plata y oro remitidas desde el interior del espacio colonial. Este grupo lo inspiraba el Marqués de Valdelirios y lo componían Domingo de Basavilbaso,<sup>2955</sup> el General Antonio de Larrazábal,<sup>2956</sup> el Coronel de Milicias Manuel Antonio Warnes,<sup>2957</sup> Francisco Rodríguez de Vida,<sup>2958</sup> Juan de Lezica y Torrezuri,<sup>2959</sup> y Juan Francisco Bazurco.<sup>2960</sup> El Apéndice Z-III nos revela los estrechos vínculos que este grupo mantenía

con numerosos clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Analizando la información de este apéndice hallamos muy pocas transacciones con los Corregidores de Indios residentes en el Alto Perú. En ese sentido, el Apéndice Z-IV nos revela las transacciones concertadas por dichos Corregidores.<sup>2961</sup>

Por el otro lado, la comunidad mercantil de Cádiz ejerció una muy fuerte influencia en el desarrollo de las facciones políticas del que luego fuera el Virreinato del Río de la Plata. El grupo de comerciantes gaditanos era extremadamente numeroso alcanzando a casi un par de centenares.<sup>2962</sup> De entre ellos sólo tres (Antonio de Aguirre, Pedro Behic y Juan Antonio Herreros) asistieron en 1764 a la asamblea constitutiva de un cuerpo mercantil en Sevilla para luego ser elegidos Diputados por los comerciantes mayoristas nacionales y extranjeros.<sup>2963</sup>

#### **A-IV La causa Escolástico-Jesuitica y la polarización de las elites.**

Las estrategias disciplinarias inherentes a la organización de la Compañía de Jesús pueden haber ejercido un atractivo propio en las elites e incluso en aquellos miembros de la plebe que valorizaban el orden escolástico-inquisitorial ratificado por la Contrareforma o Contra-reformación así como dificultado la penetración del Jansenismo y de la Ilustración o iluminismo español (Feijóo) y la implementación de las políticas secularizadoras de las Reformas Borbónicas.<sup>2964</sup> Con la política del Conde de Aranda que resultó en la expulsión de los Jesuitas, en 1767, las facciones o coaliciones político-mercantiles --que se habían inaugurado luego de la caída de Portobello (1742), la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748), el Tratado de Límites (1750) y las Guerras Guaraníticas (1754-56)-- se polarizaron aún más de lo que ya estaban desde la implantación del Real Asiento de Inglaterra (1713). Con el fin de hacer Alcaldes y ganar los Cabildos de seis ciudades de la Gobernación de Córdoba del Tucumán para sus planes de consolidación de la facción anti-jesuitica y de despojo de los bienes jesuiticos, el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>2965</sup> salió de Córdoba a principios de Diciembre de 1766.<sup>2966</sup> Para 1768, las conflictivas actitudes de Campero habían provocado en las provincias norteñas una extensa coalición de vecinos defensores de los Jesuitas.<sup>2967</sup> En Jujuy, Campero había logrado desplazar al Justicia Mayor José Antonio de Zamalloa,<sup>2968</sup> quien se hallaba aliado a un numeroso grupo de vecinos, listados en el Apéndice Z-V, desatando con ello una acción colectiva o rebelión que precipitó su caída.<sup>2969</sup> De dicho listado del vecindario de Jujuy, compuesto de 23 vecinos, sólo cinco, Asevey, Gorriti, Muruaga, Zegada y Zamalloa, estuvieron ligados al comercio con Buenos Aires.

#### **A-V El caso de las provincias del norte.**

Asimismo, Campero logró imponer en el Cabildo de Salta a los hermanos Juan Adrián,<sup>2970</sup> Pedro Vicente,<sup>2971</sup> y Antonio Fernández Cornejo y Rendón,<sup>2972</sup> pero al precio de enemistarse con una facción integrada por otro numeroso grupo de vecinos, también listados en el Apéndice Z-V. De este listado, compuesto de 26 vecinos, sólo cuatro, Erquicia, Ojeda, Rioja y Viniegra, estuvieron vinculados al comercio con Buenos Aires. Y en el Cabildo de Tucumán el Gobernador Campero apoyó al clan de los Aráoz, liderado por el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo.<sup>2973</sup> Como la implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, al perseguir el cultivo clandestino de tabaco, perjudicó económicamente a la elite Tucumana, a partir de que la Presidencia de la Junta Provincial de Temporalidades recayera en 1774 en manos de Fermín Ruiz Poyo,<sup>2974</sup>

dicha elite fue compensada con el despojo de las tierras Jesuíticas: Julián Ruiz de Huidobro,<sup>2975</sup> con la estancia "El Rincón" (6 leguas cuadradas); Juan Antonio Aráoz,<sup>2976</sup> con la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros; Francisco Javier Sánchez de la Madrid,<sup>2977</sup> con el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas cuadradas); Juan García Cárdenas,<sup>2978</sup> con el Potrero de San Jenuario, entre Lules y Famaillá, y la suerte de Los Cardones de 1 1/2 legua cuadrada, uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tañi,<sup>2979</sup> Juan López Ríos,<sup>2980</sup> con el Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,<sup>2981</sup> con el Potrero Raco, en Trancas; y Fermín de Paz,<sup>2982</sup> con los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.<sup>2983</sup>

## **A-VI El caso de Córdoba.**

En Córdoba, meses después de la expulsión de los Jesuitas, Fernando Fabro, designado como Teniente de Rey de Córdoba del Tucumán por el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa,<sup>2984</sup> y cohechado por el clan de los Allende, impuso en 1768 como Alcaldes a los patricios Joaquín de Mendiola,<sup>2985</sup> y Francisco de Armesto y Allende,<sup>2986</sup> y para 1769 a los europeos Phelipe Haedo y de la Sota,<sup>2987</sup> y Melchor Otero.<sup>2988</sup> Finalmente, en Buenos Aires, la facción pro-jesuítica, cuyos miembros eran conocidos por el apelativo de Sarracenos, detallados también en el Apéndice Z-V, carecía antes de la llegada de Cevallos de una cabeza visible. A juicio de Marilúz Urquijo (1988), con la llegada de Cevallos, y beneficiados con la libertad de comerciar con España, se agruparon a su alrededor Eugenio Lerdo de Tejada,<sup>2989</sup> Miguel de Rocha y Rodríguez,<sup>2990</sup> Pedro Medrano,<sup>2991</sup> José Blas de Gainza,<sup>2992</sup> Juan de Eguía,<sup>2993</sup> Juan de Mansilla, Pedro José Doye, Manuel de Escalada Bustillo,<sup>2994</sup> Juan Antonio Bustillo Cevallos,<sup>2995</sup> Juan Bautista de la Sala,<sup>2996</sup> Roque San Martín,<sup>2997</sup> Miguel García de Tagle,<sup>2998</sup> y muchos otros comerciantes residentes en Buenos Aires.<sup>2999</sup> También el Apéndice Z-VI incluye entre sus partidarios a los testigos que se presentaron en su juicio de Residencia.<sup>3000</sup> Según el Apéndice Z-VII este grupo Cevallista, denominado sarraceno, mantuvo estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Por el contrario, otro numeroso grupo de vecinos comerciantes, listados en el Apéndice Z-VIII, ligados con los estancieros criollos, se agrupó detrás del Marqués de Valdelirios y del Gobernador Bucarelli.<sup>3001</sup> Según el Apéndice Z-IX este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las Casas Comerciales de la Metrópoli y en las cabeceras de las ciudades del Tucumán, Cuyo, el Alto Perú y el reino de Chile. La Tabla C-IV, ilustra la nómina de mercaderes estancieros que se dieron en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII. El Apéndice Z-X nos brinda una lista comparativa de las familias involucradas en ambos bandos.

## **A-VII El partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.**

Con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778) y la Real Ordenanza de Intendentes (1782), las facciones o coaliciones político-mercantiles, que se habían iniciado antes de la concertación de la Paz de París (1763) y de la expulsión de los Jesuitas (1767), se consolidaron todavía aún más. A juicio del Gobernador del Paraguay Pedro Melo de Portugal, en un conflicto que mantuvo en 1784 con su Teniente Asesor Letrado, el Dr. Mariano Lorenzo Grambel,<sup>3002</sup> en los cabildos y demás corporaciones empezaron a darse facciones o coaliciones que excedían las fronteras de un solo municipio.<sup>3003</sup> Por ejemplo, el partido de gentes denominado por Melo ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio, tenía en Asunción

"...una liga ofensiva y defensiva, con otros partidos que hay en esa Ciudad [Buenos Aires] y Chuquisaca, a fin de conseguir providencias favorables de todos los Tribunales para con ellos hacer frente a los que no son sus secuaces, y alucinar a los que protegen y representan papel entre ellos".<sup>3004</sup>

En esa liga, la facción ante-ministerial de Asunción habría estado aliada en Corrientes con la facción anti-jesuitica de los Casajús y en Buenos Aires con la del Marqués de Valdelirios, el Obispo Manuel Antonio de la Torre y los Gobernadores Bucarelli y Vértiz. El Apéndice Z-XI nos detalla la identidad de los miembros de esta facción en el interior del espacio colonial.

#### **A-VIII La facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.**

Por el contrario, la que vendría a llamarse facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas, se habría coaligado con las facciones antiguamente pro-jesuiticas, escolásticas, beatas, peluconas, sarracenas o conspicuas del interior del Virreinato. En esta otra liga, la facción ministerial se habría aliado en Buenos Aires con un grupo constituido por los partidarios de Cevallos, llamados sarracenos; los mismos que en 1778 habían sido castigados por el Rey por haber implorado la confirmación de Cevallos en el cargo,<sup>3005</sup> constituido por el cabildante Judas José de Salas,<sup>3006</sup> y los comerciantes y cabildantes Bernardo Sancho Larrea,<sup>3007</sup> Manuel Martínez de Ochagavía,<sup>3008</sup> Diego Mantilla y de los Ríos,<sup>3009</sup> Miguel Mansilla,<sup>3010</sup> Manuel Joaquín de Tocornal,<sup>3011</sup> Pedro Díaz de Vivar,<sup>3012</sup> Francisco Antonio de Escalada,<sup>3013</sup> Cecilio Sánchez de Velasco,<sup>3014</sup> Manuel Joaquín de Zapiola,<sup>3015</sup> y Juan Antonio de Lezica.<sup>3016</sup> Los Apéndices A-III y A-VI, correspondientes al primer tomo, detallan las conexiones de este grupo con el interior del espacio colonial. El siguiente Apéndice Z-XII nos detalla la identidad de estas vinculaciones correspondientes al interior de dicho espacio colonial.

#### **A-IX La condición de extranjero.**

La condición de extranjero agregaba uno de los elementos más conflictivos en la caracterización de un mercader. Por lo general, era una de las muletillas más comunes para excluir a algún competidor de los beneficios mercantiles. La presencia de comerciantes extranjeros, la mayoría Portugueses, en los mismos orígenes del Buenos Aires colonial dio lugar a intensas polémicas historiográficas. Mientras una historiografía liberal sostenía que estos comerciantes constituían una minoría oprimida, otra historiografía "nacionalista" opinaba que constituían una minoría opresora. Por el contrario, el que suscribe, en un trabajo publicado en 1985, sostiene que dicha minoría fue una minoría intermediaria en el proceso de mudarse de esa posición a una dominante.

Sin embargo, la xenofobia proteccionista, alimentada por el mercantilismo vigente entonces, cumplía --es preciso reconocerlo-- un rol obstaculizador en el funcionamiento normal del mercado interno, que inmovilizaba la estructura social colonial, haciendo de aquella remota mudanza social un acontecimiento efímero y fugaz. La Lista Z-I revela la nómina de los Portugueses entrados en Buenos Aires sin licencia y bajo fianza que se hallaban fugados. Pero la protección que las políticas xenofóbicas dispensaban era una protección al comercio monopolista y no a la producción. Era el mismo criterio que se seguía en la práctica de la política aduanera medieval, según el cual en la inmensa mayoría de los casos sólo tributaban los forasteros.<sup>3017</sup> En el caso de Adrián Pedro Warnes,<sup>3018</sup> ocurrido en 1729, Pedro Prieto Laso de la Vega, Caballero de la Orden de Santiago, pide

se lo excluya a Warnes como consignatario de Guillermo Terry, una de las principales casas monopolistas de Cádiz, por ser hijo de extranjero holandés.<sup>3019</sup> Veinte años más tarde, en 1752, se suscitó un sonado caso con Juan Bautista Patrón,<sup>3020</sup> un genovés, Capitán de un barco mercante, quien aunque desposó una criolla llamada Antonia Díaz Pimienta,<sup>3021</sup> fue expulsado por extranjero.<sup>3022</sup> En otro caso planteado en 1756 con motivo de declararse la insustancialidad de un instrumento de cesión otorgado por un irlandés, Patricio Lynch,<sup>3023</sup> que vino de repostero en el navío La Lidia, el denunciante afirma que

"...ningún extranjero puede tratar ni contratar en estas partes vajo de las penas en ellas establecidas, ni igualmente poder ser apoderados de mercaderes para compras, ventas, cesiones, y finiquitos...por el fraude que se seguiría a la Real Hacienda que tan estrechamente les prohíbe todo género de trato y contrato, pues con el pretexto de apoderado simularían contratos en nombre de sus partes que en verdad eran suyos propios, viniendo a quedar el poderdante hecho un testaferro".<sup>3024</sup>

En el caso planteado por Francisco Mariño Barros,<sup>3025</sup> contra Bernardo Fuster,<sup>3026</sup> sobre pretender derecho a los efectos embargados por el Comandante de la Guardia de Pergamino Francisco Noguera, Mariño manifestaba en 1771 que el principal obstáculo para la administración de la justicia es "...ser yo extranjero, y en no serme lícito comerciar en esta ciudad por ser Puerto de Mar".<sup>3027</sup> Si bien, Mariño agradece haber dado con un fiscal o denunciante que promueva los derechos de la corona, se pregunta "...¿está prohibido, que el extranjero cobre lo que se le debe?".<sup>3028</sup> Si esto es cierto, como lo afirma Mariño, "...¿que duda tiene el contrario, en que yo aunque sea extranjero cobre un débito legítimamente causado, y sin perjuicio de la corona real?".<sup>3029</sup> Es lícito que alguien que no tiene ninguna facultad, "...se tome las que sólo son privativas del Sr. Gobernador para censurar mi residencia, y mis cortas cobranzas?".<sup>3030</sup>

El poder de la burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar el rubro más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de las mercancías europeas y la mercancía-moneda americana. Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil dependiente. Pero, la progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes monopolistas. La alianza de grupos mercantiles organizada bajo la hegemonía de la gran burguesía comercial monopolista habría incorporado, en una posición subordinada cada vez que había paz entre España e Inglaterra, los intereses de otras minorías comisionistas de origen local. A través de estas alianzas, lograría redefinir un modo de inserción en la estructura comercial colonial permitiéndole obtener una cierta parte del excedente generado por este modelo de articulación lógica, entre producción y circulación.

## **A-X La fundación de un Consulado de Comercio.**

Para esa época, la Junta de Comerciantes y Mercaderes, convocada esporádicamente por el Virrey, se reunía para presionar por la fundación de un Consulado de Comercio. En 1785 se reunió nuevamente para elegir como sus autoridades: primero a un triunvirato integrado por Bernardo Sancho Larrea, Manuel Rodríguez de la Vega,<sup>3031</sup> y Martín de Sarratea,<sup>3032</sup> y luego a una comisión compuesta por otros quince mercaderes mayoristas para servir como comité consultivo de las tres autoridades elegidas

previamente.<sup>3033</sup> Recién en 1794, diez años después de dichas elecciones, fue erigido el Consulado de Comercio de Buenos Aires,<sup>3034</sup> entrando su Junta de Gobierno a controlar el tráfico comercial con todo el interior, designando Diputados en cada cabecera de provincia, y quedando la antigua Junta de Comerciantes definitivamente disuelta. Pero en tiempos de las guerras napoleónicas, cuando el equilibrio político Europeo entró en crisis, a semejanza del macizo andino, el control que la metrópoli española ejercía en el Río de la Plata sobre su aparato estatal y su comercio distó de ser monopolístico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) las estrategias monopolistas habrían dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo puramente eventual. La lucha contra las estrategias monopolistas convirtiéndose entonces, en los prolegómenos de la Revolución de Independencia, en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en ese entonces prevalecía, en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en buques neutrales, una estrategia librecambista cuasi internacional. Las guerras entre España y Francia primero, y España e Inglaterra más luego, desatadas en 1791 y 1796, alteró entonces la privilegiada situación de los monopolistas porteños, al hacer aparición nuevos actores con motivo del permiso que la metrópoli se vio obligada a conceder primero a la Trata de Negros, personificada en el gran comerciante Tomás Antonio Romero,<sup>3035</sup> y sus colegas esclavistas Pedro Dubal,<sup>3036</sup> Nicolás Acha,<sup>3037</sup> y Manuel Hermenegildo de Aguirre,<sup>3038</sup> y segundo al comercio con Colonias Extranjeras y en buques neutrales,<sup>3039</sup> personificados en comerciantes tales como Pedro Dubal, José De María,<sup>3040</sup> Manuel Aguirre y Ventura Marcó del Pont.<sup>3041</sup> Un año después, en 1797, se estableció que los hacendados, íntimamente ligados hasta entonces al contrabando, compartirían los cargos con los comerciantes en partes iguales, siendo estos últimos por lo general los dominantes, al estar apuntalados por el Cabildo porteño.<sup>3042</sup> Finalmente, el Apéndice Z-XIII detalla la nómina de los Diputados del interior. Entre sus tareas tenían la de dirimir los conflictos entre comerciantes y la de controlar las extorsiones que los Cabildos y las Juntas de Comerciantes exigían tradicionalmente a los apoderados del Presidio de Buenos Aires. Entre ellas las contribuciones para las cinco corridas de toros que se practicaban anualmente y para la Festividad de Corpus Christi.<sup>3043</sup>

Este control comprendía también la elección del conductor del Situado, puesto que en Potosí, en la década del 50, estaba a cargo del Cabildo y de los Mercaderes de Plata;<sup>3044</sup> y en la década del 60, en vista de los repetidos desfalcos, a cargo del Procurador de la Compañía de Jesús.<sup>3045</sup> Era tradicional que quienes detentaban las varas concejiles e integraban el Gremio o Junta de Comerciantes, influyeran en la designación de quienes conducirían los Situados con destino a Buenos Aires. Estas presiones para designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de Buenos Aires de parte de los cabildantes y Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, de los Visitadores Generales, de los Corregidores, del Virrey del Perú y de los oidores de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas. La persona en quien recaía la designación de Conductor del Situado, por lo general, operaba en el negocio minero.<sup>3046</sup> Por ejemplo, Juan Francisco Uzal S.J., Procurador del presidio de Buenos Aires, no dudaba en Enero de 1753 que había en la selección del Conductor del Situado "...muchos empeños para sujetos de esta Villa [Potosí],...como Don Manuel Prego de Montaos,<sup>3047</sup> Don Pedro Maquiriain,<sup>3048</sup> Don Joseph de Lezica,<sup>3049</sup> y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marqués de Casa Palacio".<sup>3050</sup> Más luego el cargo de conductor del Situado fue subastado al mejor postor, habiendo sido sus detentadores en 1766 Gregorio de Zegada, entre 1780 y 1794 Tomás Antonio Romero, entre 1794 y 1795 Tomás Fernández de Betoño, y entre 1795 y 1800 Tomás Villota.<sup>3051</sup> En la década del 90 la Junta de Comerciantes de Potosí había aprobado un Reglamento de Situados con 17 puntos en

donde se estipulaban los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.<sup>3052</sup> De flete el situadista cobraba entre 1/4% y 1/2% del valor de la remesa ganando de \$1.500 a \$4.000 en cada viaje.

La cláusula del Reglamento de Situados más objetada por el Consulado de Buenos Aires era la de que los situadistas debían ser, al igual que los Alcaldes ordinarios de su Cabildo, oriundos o residentes de Potosí. Esta cláusula generó toda suerte de animosidades en los comerciantes de toda la carrera entre Potosí y Buenos Aires, precipitándose finalmente el conflicto en el seno de la misma Junta de Comercio potosina.<sup>3053</sup> Por un lado se hallaban los residentes Potosinos, propietarios de ingenios e integrantes del Gremio de Azogueros, seguidores de Indalecio González de Socasa,<sup>3054</sup> y por el otro un grupo liderado por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza.<sup>3055</sup> El poder político de Socasa descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos azogueros de Potosí así como por comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de Ugarteche,<sup>3056</sup> y entre los Potosinos se contaban Manuel de Bulúcu,<sup>3057</sup> Juan Bautista Elorreaga,<sup>3058</sup> Nicolás Ponte,<sup>3059</sup> Nicolás Oliden,<sup>3060</sup> Francisco Zenavilla,<sup>3061</sup> y Joaquín Obregón Cevallos.<sup>3062</sup> Entre los porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz Valiente,<sup>3063</sup> Juan Estéban de Anchorena,<sup>3064</sup> Domingo de Ezcurra,<sup>3065</sup> y los Diputados del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,<sup>3066</sup> y Martín de Gainza.<sup>3067</sup> Ybieta en tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios Gregorio Barragán,<sup>3068</sup> y Joaquín de la Quintana,<sup>3069</sup> los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,<sup>3070</sup> y Domingo Antonio de Achával,<sup>3071</sup> los mercaderes porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,<sup>3072</sup> Manuel Alejandro Obligado,<sup>3073</sup> Ramón de Aramburu Zavala,<sup>3074</sup> Juan González y Torres y José Miguel de Tagle,<sup>3075</sup> y los comerciantes minoristas Antonio González de Ortega, Gerónimo Tudó,<sup>3076</sup> y Miguel de Amatller.<sup>3077</sup> Finalmente, en vísperas de la revolución de independencia los sobornos a la elite capitular de Potosí devinieron en una corrupción abierta, con cómplices en toda la carrera de Potosí a Buenos Aires.<sup>3078</sup>

Las contradicciones por la renta minera se reflejaron también en las luchas que se libraron en el seno de las Diputaciones del interior y del Consulado de Comercio de Buenos Aires por conducir el mineral amonedado, de plata y oro, hasta los puertos de salida. Si bien las contradicciones entre los intereses del capital comercial gaditano y limeño se resolvieron a favor del primero, las contradicciones entre los intereses del capital agro-minero y los intereses del capital comercial no alcanzaron a resolverse en el siglo XVIII. La abolición de los repartos mercantiles habría perjudicado a la clase azoguera altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por los Corregidores, y en su lugar beneficiado al grupo de comerciantes monopolistas porteños. Dicha abolición habría alimentado la mayor parte de los conflictos suscitados en la Junta o Gremio de Azogueros y en el Cabildo de Potosí en la segunda mitad del siglo. Sin duda, en esta fractura de la unidad minero-exportadora reside la raíz de la impotencia de los patriciados Altoperuanos, la consiguiente fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la segregación boliviana.

En suma, podemos aseverar, a la luz de lo aquí relatado, que las alianzas y rivalidades políticas a lo largo y ancho de todo el virreinato, que ocurrían en las corporaciones del estado colonial (Cabildos seculares y eclesiásticos, Universidades, Gremios y Cofradías), tenían como substrato material las sociedades y compañías articuladas por el capital mercantil invertido en el comercio de larga distancia. Las desavenencias originadas por el trato desigual derivaron en separatismos y anexionismos

que fueron desestructurando el espacio colonial evocando así fenómenos semejantes que le acontecieron al antiguo imperio romano.

## **Capítulo II-A-2      Clivajes ideológicos (escolásticos-humanistas-iluministas) y gestación de una esfera pública.**

### **Índice**

- B-I Tradición historiográfica en historia intelectual
- B-II Vinculación entre la religión y la cultura
- B-III Articulación de una auténtica esfera pública.
- B-IV Ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto.
- B-V Práctica del derecho de representación.
- B-VI Nociones de soberanía municipal.
- B-VII Nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular.

### **B-I Tradición historiográfica en historia intelectual**

En el género historiográfico denominado historia intelectual, que analizaba la historia del pensamiento político bajo un matiz estructuralista o contextualista, Skinner (1969) mantuvo posiciones substancialistas al sostener que las interpretaciones secundarias de un texto que se fundaron en una interpretación básica errónea del mismo llevan necesariamente a serios anacronismos.<sup>3079</sup> Más luego, en una línea de investigación similar, Pocock (1972) sostuvo que la idea central de un texto fundada en una interpretación secundaria anacrónica es necesariamente errónea.<sup>3080</sup> Después, Pocock (1985) innovó en sus posiciones por cuanto sostuvo que las transformaciones que los actos individuales ejercen sobre los lenguajes heredados deben estar situados en última instancia en la historia problematizada de la experiencia de dichos actos.<sup>3081</sup>

De manera semejante, la historiografía alemana, conocida con el nombre de *Begriffsgechichte* o Historia conceptual,<sup>3082</sup> observó que las prácticas políticas del siglo XVIII fueron organizadas alrededor de conceptos ideológicos claves y que estos últimos habían experimentado a lo largo de dicho siglo y el siguiente una acelerada transformación en sus significados y funciones.<sup>3083</sup> Y en el género jurídico, entre los principios interpretativos en la adjudicación judicial, la corriente del convencionalismo sostuvo que sólo cuando se agota la fuerza de la jurisprudencia (pretérito) los fallos judiciales deben hallar un fundamento que se inspire en el futuro.<sup>3084</sup> Más luego, una corriente de corte escéptico, denominada naturalista o pragmática legal, sostuvo que los jueces deben alcanzar las decisiones que estimen correctas sin importar la coherencia con la jurisprudencia.<sup>3085</sup> Y recientemente, el principio de la integridad adjudicativa -- perteneciente a la llamada corriente instrumentalista-- observó que las prácticas jurisprudenciales debieron haber estado siempre dirigidas al futuro, con el pasado jugando sólo un rol pragmático en la determinación de las decisiones correctas.<sup>3086</sup> Dichos conceptos fueron para Europa, en el siglo XVIII, según Baker (1981) los de soberanía, representación, constitución y opinión;<sup>3087</sup> y según Koselleck (1985) las nociones de estado, libertad e historia. Una gran variedad de dichos conceptos, en la América Latina colonial, se encontraban en los discursos jurídicos,<sup>3088</sup> como en el caso de la limpieza de sangre,<sup>3089</sup> el derecho de representación;<sup>3090</sup> el derecho de abolengo, a través de los

recursos procesales del tanteo y del retracto,<sup>3091</sup> o la capellanía y el mayorazgo,<sup>3092</sup> en los discursos religiosos (crónicas conventuales, sermones, excomuniones);<sup>3093</sup> en los discursos literarios y poéticos;<sup>3094</sup> en los discursos geográficos e históricos;<sup>3095</sup> en los discursos o tratados jurídicos; o en los discursos científicos;<sup>3096</sup> lo cual abonaría la hipótesis acerca de la progresiva madurez social e intelectual de las elites políticas que luego concibieron la independencia. Por el contrario, Chiaramonte (1982,1989) sostiene, la casi absoluta inanidad de dichos discursos.<sup>3097</sup>

Asimismo, para Aufderheide (1976), Hünold Lara (1988) y Chartier (1991), la nueva esfera pública estaba alimentada por las derivaciones y mediaciones judiciales de los conflictos producidos en la esfera privada, más específicamente por la politización de las disputas entre señores y familias.<sup>3098</sup> En este último sentido, la articulación de una auténtica esfera pública, divorciada de la esfera privada, en el siglo XVIII Europeo, ha sido vista recientemente como el verdadero sustrato de la creación de la sociedad burguesa moderna. Pero dicha articulación no estaba visualizada de una forma semejante por quienes han cultivado esta problemática. Mientras que para Koselleck (1988), la esfera de lo público estaba plenamente identificada con el Estado; para Habermas (1989), la auténtica esfera pública, desde la cual subyacía el principio de la publicidad, se dividía en tres áreas: a) el mercado de productos culturales (libreros, bibliófilos, etc.); b) la República de las Letras, con sus instituciones de sociabilidad intelectual (bibliotecas, bufetes de letrados y notarios, salones del patriciado, imprentas, periódicos, academias de jurisprudencia, etc.); y c) la esfera pública en el terreno político (autoridades políticas, judiciales, notariales y policiales).

En el sentido apuntado por Habermas, las bibliotecas, imprentas, bufetes y academias de jurisprudencia fueron los recintos donde al cultivarse primero las nociones teológicas, y luego las nociones jurídicas tuvo lugar el nacimiento de la llamada opinión pública.<sup>3099</sup> La imprenta llevada a Nueva España por el Virrey Antonio de Mendoza en los primeros años de la colonización (Medina, 1893), y al Perú por los Jesuitas en 1567 (Medina, 1958-62), importó un apoyo significativo a la docencia de los colegios, universidades y academias teórico-prácticas de jurisprudencia en pos del desarrollo del conocimiento y vocabulario jurídicos. La aparición de libros impresos en México y Perú, profundizó el afán por el estudio del derecho. El desempeño del periodismo inauguró la opinión pública.<sup>3100</sup> El rol de las bibliotecas públicas y privadas, así como las de los párrocos y bibliófilos, también significaron un bastión decisivo en la gestación de la opinión pública.<sup>3101</sup>

## **B-II Vinculación entre la religión y la cultura**

Con la modernidad Renacentista, que estaba compuesta por un capitalismo mercantil, una socialización estamental, y una sacralización y politización escolástico-inquisitorial, el colonialismo de los Austrias pudo ensayar la conquista territorial, militar y espiritual de América. Esta conquista y la política absolutista, que sin ser ilustrada no era totalmente equivalente a la del despotismo asiático, se impuso sobre una inmensa realidad indígena, la cual poseía su propio mundo espiritual, mítico y simbólico. En el caso de las civilizaciones autóctonas rioplatenses dicha realidad avasallada vendría a constituir su Paraíso Perdido, equivalente al mito de la raza de oro de la cosmogonía hesiódica, la cual cultivaba diversas quimeras, entre ellas la de la Tierra sin Mal.<sup>3102</sup>

A pesar de erosionar las culturas y lenguas nativas, extirpar sus idolatrías, dismantelar los sistemas legales y la organización económica indígenas e importar el esclavismo africano, el colonialismo español --a diferencia del colonialismo lusitano-- engendró en América una multitud de universidades y colegios, a imagen y semejanza de las instituciones de la modernidad renacentista del mediodía Europeo. Más específicamente, el desarrollo de la industria minera en el Alto Perú alentó la erección de la Universidad de Chuquisaca; la cría y tráfico de mulas en la carrera entre Buenos Aires y Potosí estimuló bajo la hegemonía escolástico-jesuítica la fundación de la Universidad de Córdoba; y muy luego, seis años después de inaugurada una política secularizadora y revisionista de la Contra-Reforma, con la expulsión de los Jesuitas (1767), el Virrey Vértiz dio nacimiento en Buenos Aires al Colegio de San Carlos (1773) y con él a un clima de ilustración y libre pensamiento.<sup>3105</sup> En cuanto a sus contenidos pedagógicos, la curricula teológica y humanística estuvo estrechamente ligada entre sí, pues los conocimientos científicos se emparentaron con las expediciones descubridoras, y las transferencias tecnológicas se vincularon con la explotación de las riquezas mineras y sus derivados (Universidades de Charcas y de Santiago de Chile).<sup>3104</sup>

La íntima vinculación entre la religión y la cultura, la persistencia de los legados premodernos indígenas y africanos, las enseñanzas de la anatomía, la física y la astronomía antigua y medieval (Ptolomeo-Occam) y moderna (Copérnico y Newton) y la incipiente fragmentación de las disciplinas impartidas en las aulas universitarias coloniales --consistentes en el Trivium (gramática, retórica, dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, música, geometría, astronomía)-- estaba entrañablemente relacionada con el cultivo de un arte e ideario barrocos, una pedagogía jesuítica escolástica, contra-reformista y anti-secularizadora, una estructura social fragmentada en un inmenso mosaico de etnias, gremios, corporaciones y regiones, amalgamadas en gobernaciones, capitanías y virreynatos o confederaciones de ciudades-estado, y una estructura burocrática colonial, estamental, etnocéntrica, patrimonialista, corporativa e inquisitorial.<sup>3105</sup> En esta estructura, los Virreyes, los Capitanes Generales y los Gobernadores-Intendentes gozaban de un escaso poder por cuanto la autoridad judicial estaba compartida con las Reales Audiencias y con los Tribunales Eclesiásticos dependientes de los Arzobispados.<sup>3106</sup> Tan compleja era la administración del poder, que el aparato ideológico de la Inquisición jugaba un rol disuasorio determinante en la provisión de las cátedras de las universidades, y esta última facultad estaba estrechamente vinculada con la elección de los Oidores en las Reales Audiencias y la de los alcaldes en los Cabildos Seculares y también con la estamental financiación y ordenación de los presbíteros que integraban los curatos, los Cabildos Eclesiásticos y la carrera clerical.<sup>3107</sup>

En este tipo de universidades, propias de la modernidad escolástico-absolutista, el conflicto fue --antes de la recolonización borbónica-- eminentemente corporativo y simbólico u honorífico pues residía en las incompatibilidades, fueros e inmunidades de los cargos de Rector y Decanos; en las prelaciones, protocolos, varonías, y primogenituras de los ceremoniales académico-político-religiosos; y en las

impugnaciones fundadas en prohibiciones inquisitoriales y estigmas de limpieza étnica y estamental acreditados notarial y judicialmente.<sup>3108</sup> Posteriormente, con las reformas borbónicas sobresalieron los conflictos ideológico-políticos, como el que mantuvo Juan Baltasar Maziel en Buenos Aires y el que sostuvo el Dr. Juan José Segovia en Charcas. Habiendo cesado el Dr. Gregorio de Olaso en el cargo de Rector de la Universidad de Charcas, en 1785 lo intrigaba al Virrey del Río de la Plata sobre las connotaciones ideológico-políticas de su eventual sustituto el Dr. Juan José Segovia,<sup>3109</sup> acusándolo de jactarse "...de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se reputa el tribuno del Pueblo, y el Cónsul de estas Provincias".<sup>3110</sup> Segovia fue Oidor de la Real Audiencia de Charcas, era conocido de Juan Bautista Maziel,<sup>3111</sup> y un par de meses antes de la partida de Olaso había participado en la denominada *revolución de los muchachos*, acontecimiento provocado por la presencia en Charcas del Regimiento de Granaderos de Extremadura.<sup>3112</sup> Las advertencias de Olaso no fueron en vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política por la cual había desterrado a Montevideo al Maestre-Escuela Juan Baltasar Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de cárcel. Segovia purgó su condena en el presidio de Buenos Aires, para luego obtener del Rey cuatro años después, en 1789, una reivindicación completa.<sup>3113</sup> El resultado de esta política represiva fue la corrupción de los estudios, tal como lo aseveraba el Deán Funes en 1805, en carta al Obispo Orellana.<sup>3114</sup>

Con la crisis del orden imperial-absolutista, puesta en evidencia con la inauguración de las políticas secularizadoras y anti-escolásticas (debilitamiento de la Inquisición, expulsión de los Jesuitas, 1767) y con las frecuentes expediciones Ilustradas de medición de límites y observaciones geodésicas y astrofísicas (1754), las posteriores Reformas Borbónicas, y la fundación del Colegio de San Carlos y el Tribunal del Protomedicato comenzó un lento proceso de erosión del pensamiento barroco-inquisitorial, de descodificación y desterritorialización, de fragmentación de las disciplinas, de enciclopedización de los conocimientos y de diversificación de las profesiones, que llegó al extremo de generar un clima de debate alrededor de la filosofía y la ciencia de la modernidad Ilustrada (Enciclopedismo) y anticipar así el proceso revolucionario en ciernes.<sup>3115</sup> El incremento en la producción de egresados, resultante de la creación del Colegio de San Carlos y otras numerosas instituciones de educación superior, de inspiración Iluminista, al superar el número de posiciones de elite disponibles, habría desequilibrado el sistema político.

La brecha cultural existente entre la generación criada en una cultura manuscrita y aquella otra generación posterior educada en una cultura letrada o libresca fue abismal y dio lugar a la gestación de una intelectualidad emergente compuesta por una elite iluminista y revolucionaria de origen criollo (Juan Baltasar Maziel), y a la presencia de numerosas sociedades secretas y logias masónicas.<sup>3116</sup> En ese contexto espiritual y cultural, a partir de la modernidad Ilustrada, y a semejanza de la universidad Napoleónica, se combatió la universidad del estado absolutista, que estuvo corporativamente controlada primero por la Compañía de Jesús y luego por el restante aparato de la Iglesia, centrada en individualidades estamental y etno-céntricamente localizadas, y dominada por el conocimiento creacionista, teológico-escolástico y contra-reformista al estilo providencialista del Obispo Bossuet inaugurado en la temprana modernidad absolutista (Renacimiento).<sup>3117</sup> Asimismo, en las universidades se comenzó a hacer hincapié en un proceso secularizador mucho más amplio que la mera

secularización de los bienes eclesiásticos.<sup>3118</sup> Se trataba de una secularización del conocimiento y de la formación de profesionales liberales, en aras de una educación centrada en individualidades históricamente subjetivadas, donde el cultivo de la ciencia, el derecho y la filosofía fueron lentamente disociados del conocimiento teológico (UBA-Rivadavia, 1822).<sup>3119</sup>

La política secularizadora inaugurada con la expulsión de los Jesuitas en el siglo XVIII habría entonces coadyuvado a la gestación de la opinión pública. Clausurados los establecimientos jesuíticos, el mismo Furlong (1960) reconoce por boca de Pemán (1944) que

"...vinieron sin selección, troyes de mediocres profesores al país [lo cual] dio un impulso enorme a la difusión e influencia de lo que se ha llamado luego el criollismo, o sea, la difusa conciencia de solidaridad diferencial --raíz de independencia-- de los naturales del país".<sup>3120</sup>

Mas aún, en el sentido señalado por Poster (1987) acerca de la relación entre el conocimiento y el poder,<sup>3121</sup> debemos sostener también con Tigar y Levy (1978) y Foucault (1986) que la implementación de la legislación positiva para la reforma del estado colonial no era ajena a las mejores tradiciones de las monarquías occidentales, para las cuales el conocimiento y desarrollo de discursos, nociones y conceptos jurídicos estaban íntimamente vinculados a los avances de la burguesía mercantil y a la consiguiente transformación de las formas de estado.<sup>3122</sup> Para Foucault (1980), las transiciones de las formas de estado deben juzgarse de acuerdo a como el estado ejercía el poder, si era un estado jurídico, donde el monarca se erigía por sobre los señores feudales para proclamar su derecho absoluto a dictar la ley; si administrativo, donde la representación estaba limitada por la territorialidad de las fronteras nacionales; o si gubernamental, donde el eje de la cuestión se trasladó de la representación dinástica a la territorial, y de esta última a la poblacional, con sus volúmenes y densidades.<sup>3123</sup> Y para Habermas (1987), se distinguieron cuatro hornadas de juridización que marcaron igual cantidad de épocas: 1) la primera hornada condujo al Estado Burgués en la época del Absolutismo; 2) la segunda hornada al Estado de Derecho, cuyo paradigma fue la Monarquía Alemana; 3) la tercer hornada condujo al Estado democrático de derecho, consecuencia de la Revolución Francesa; y 4) la cuarta hornada, al Estado social y democrático de derecho, cuyo máximo exponente fue la República de Weimar.<sup>3124</sup>

En el rumbo apuntado por las tesis de la integridad adjudicativa y la *Begriffsgechichte* y por las interesantes críticas apuntadas por Aufderheide (1976), Hunold Lara (1988), Chartier (1991), Abellán (1991) y Eley (1994), cabe entonces preguntarse si las tradiciones y los discursos jurídicos en el seno de los bufetes de letrados, los salones del patriciado, las Audiencias, los Cabildos seculares y eclesiásticos y los Tribunales del Consulado y del Santo Oficio de la Inquisición se hallaban o no relacionados con las nociones, las funciones y los procesos de corporativismo, patrimonialismo, prebendarrismo, patriarcalismo, señorialismo, etno-centrismo, nepotismo y crisis del mundo colonial, y con la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado.<sup>3125</sup> Con ese objetivo, hemos recogido más de una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), en el Archivo del

Arzobispado de Córdoba,<sup>3126</sup> y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC); así como la información histórico-genealógica que nos proveen diversos tratados.<sup>3127</sup>

### **B-III La articulación de una auténtica esfera pública.**

El verdadero sustrato de la creación de la sociedad burguesa moderna o la madurez social e intelectual de una elite revolucionaria ha consistido en la articulación de una auténtica esfera pública.<sup>3128</sup> En un principio, Tomás y Valiente (1969) observó que las prácticas judiciales criminales fueron organizadas en el siglo XVIII alrededor de estructuras jurídicas privadas, y que estas habían experimentado a lo largo de dicho siglo una profunda modificación en sus contenidos. En el tradicional arreglo de los litigios criminales, la parte agraviada podía alcanzar un arreglo privado con el ofensor solo en los casos de ofensas contra la vida y no contra la propiedad, requiriendo en estos casos de compensaciones pecuniarias para evitar llevar al caso a la justicia.<sup>3129</sup> Incluso una persona que fue sentenciada a un castigo por un Alcalde Ordinario podía compensar a la parte agraviada y así evitar el castigo. De acuerdo a la ley española, no solo los crímenes privados podían ser castigados, sino también pequeñas ofensas llamadas pecados públicos. En los casos criminales cometidos contra individuos privados la ley española preveía la posibilidad que el ofensor quedara libre de toda responsabilidad pagando una cantidad designada de moneda para obtener un perdón judicial. Pero en aquellos casos criminales donde el interés público estaba envuelto, aún obstando el perdón de la víctima, la prosecución pública continuaba hasta que el ofensor fuera castigado.<sup>3130</sup> Los perdones o la remisión de los cargos, significaba la remisión de la ofensa o de los insultos que uno hubiere recibido, o de la pena que le hubiere correspondido. En el perdón notarial, la causa era brevemente relatada. En ella constaba si el reo estaba libre o en prisión. Por lo común, en el perdón la parte ofendida manifestaba que, luego de perdonar la ofensa en forma gratuita o por un precio, cancelaba el caso, renunciaba los derechos judiciales civiles o criminales, y rogaba a su Majestad el indulto o remisión de cualquier pena. En algunos casos, los perdones estipulaban que el precio pagado debía cubrir los gastos del juicio, la pensión para la viuda o los hijos menores, los gastos para el cuidado o tratamiento, las plegarias por el alma de la víctima, etc. Este tipo de prosecución privada permitió a la víctima de un crimen determinar la severidad de la prosecución, el cumplimiento de la ley o la reducción de los cargos. Podía incluso perdonar las ofensas completamente decidiendo no ir a la justicia.<sup>3131</sup> Varios de estos casos ocurridos en el Buenos Aires del siglo XVII se relatan en un trabajo de mi autoría.<sup>3132</sup> En el siglo XVIII, los perdones escasearon. No obstante, en Córdoba se registraron en la década de 1770 sonados casos protagonizados por miembros de la familia de los Allende y Losa.<sup>3133</sup>

Asimismo, en el ámbito del derecho señorial, que luego se dio en llamar derecho privado, por oposición al nuevo derecho público, se admitía que en las relaciones entre los amos y los esclavos, los primeros ejercieran un amplio derecho de castigar las indisciplinas de sus siervos. Hunold Lara (1988) fué el primer historiador en formular una explicación teórica a esta realidad. El recurso al castigo era un mecanismo instrumentado por los amos y las autoridades políticas para reafirmar su señorío, y con ello contrarrestar la indisciplina y la fuga. Debía ser moderado para poder ser correctivo, y por lo tanto no podía abusarse del mismo, maltratando los esclavos o matándolos.<sup>3134</sup> Se constituyó así el castigo privado en el factor que más desmiente la supuesta docilidad de los esclavos Rioplatenses. Recurrir a la justicia capitular para castigar a sus esclavos podía tornar la dominación señorial en una cosa pública, que desacreditaba la supuesta nobleza de sus amos.<sup>3135</sup> José Dionisio, esclavo de la Hacienda de Santa Catalina, de la Testamentaría de Francisco Antonio Díaz,

declaraba en 1808 que el mulato Valentín, de oficio sastre, había sido castigado dos veces; la primera por su amo José Xavier Díaz

"...por causa de una mujer que fue a buscar de noche muy secretamente llamada Vizenta, hija de la Candelaria, casada segunda vez con Manuel Antonio, esclavo de la casa como los demás, el cual lo sintió a deshoras, y dio parte a dicho Don José, que fue el motivo por el cual fue castigado en presencia del declarante con cien azotes que regula se le darían, quedando bien lastimado, de cuyas resultas el declarante lo curó por estar en el mismo cuarto en que veía no podía sufrir los calzones por las llagas, y por esto andaba en calzoncillos hasta que sanó a los quince días".<sup>3136</sup>

El esclavo zapatero Manuel denunciaba en 1799 que Francisco Ruiz Quevedo por orden de su amo Tiburcio López de Heredia lo encerró "...en un cuarto húmedo, inhabitable, atado a un madero con una cadena, azotado cruelmente, y privándome del alimento".<sup>3137</sup> Estos hechos, fueron reconocidos por López de Heredia, pero disimulados "...con un disfraz despreciable, pues los azotes los nombra papirotes, y la dura prisión y terrible castigo correcciones paternas".<sup>3138</sup> Al negro Pedro, de 15 años, por huidor, su amo Juan Dionisio Campos, vecino de San Vicente, lo tuvo en 1813, año de la Declaración de libertad de vientres, "...con una plancha de fierro que en el día se le quitó".<sup>3139</sup> María, esclava de Hipólita Casiana Olmos de Aguilera, recibió azotes en 1814, por mano de Juan Francisco Moyano.<sup>3140</sup> El mulato Manuel, oficial zapatero, de 27 años, "...enfermo de una pierna, ladrón, huidor, ebrio, por cuio motivo lo he tenido en prisiones en mi casa" fue vendido por Francisco Pereyra en 1796 en \$200 al dueño de panadería Juan de Serna y Villa.<sup>3141</sup> Más luego, el Alcalde de Primer Voto Juan Agustín Videla, en virtud de la denuncia de Pereyra "...lo hizo traer al Juzgado y sacándolo de la prisión [lo] detuvo en la Real Cárcel".<sup>3142</sup> Y Mayo (1992) constató, en los inventarios de los conventos Betlemíticos, la existencia de numerosos grillos.<sup>3143</sup> Pero de todos los casos recordados, sin duda el que más repercusiones tuvo fue el ocasionado en Buenos Aires en 1785 por los crueles castigos de azotes recibidos por la mulata Francisca de manos de su propia ama Clara Echenique, la "Quintrala" cordobesa.<sup>3144</sup>

Los castigos inmisericordes, que en algunos casos llegaron a provocar homicidios, hoy jurídicamente conocidos como delitos preter-intencionales, por exceder la necesaria moderación y el carácter meramente disciplinario y ejemplarizador del castigo,<sup>3145</sup> ocasionaban serios trastornos que llevaban en muchos casos a interminables litigios judiciales.<sup>3146</sup> En 1781, ocho años antes de la Revolución Francesa, Ana de los Ríos,<sup>3147</sup> promovió contra la parda Agustina una instancia por calumnias.<sup>3148</sup> Doña Ana alegaba, con la defensa del letrado José de Gurruchaga, que los esclavos

"...por el más leve pretesto qual es una corrección doméstica, ocurren a formar tales quejas y figurar tales rigores que son capaces de mover a compasión a la persona más indolente, y que negándosele al amo la razón se la concedan a ellos, habiendo llegado esto a tal extremo que en el día no tienen los Amos valor para castigar las faltas, o delitos de sus familiares por el recelo que les asiste de que al siguiente día puedan comparecer a quejarse en algún Tribunal y verse en los términos de padecer los bochornos que yo me veo sufriendo".<sup>3149</sup>

Y en 1761 el navarro Marcos Pérez fue acusado en Montevideo de haber dado muerte por exceso de castigo a la negra Lucía.<sup>3150</sup> Veinte años más tarde, en 1783, Domingo Maurín fué acusado en Buenos Aires de haber matado a su propia esclava "...de

resultas de rigurosos azotes".<sup>3151</sup> Y en 1812, el mallorquín Pedro José Oliver y su mujer Matilde Montaner fueron procesados "...para clarificar la razón por la cual su esclava Tomasa murió".<sup>3152</sup>

#### **B-IV El ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto.**

Entre las instituciones importadas de Europa, las jurídicas ocuparon uno de los lugares más expectantes.<sup>3153</sup> En el ámbito del derecho gentilicio, de abolengo o de sangre, que luego se dio en llamar derecho privado, por oposición al nuevo derecho público, específicamente en el ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto, y en la elección de los herederos de sucesiones intestadas y de patronatos capellánicos legos vacantes, tuvo lugar la práctica del derecho de representación, la cual había sido importada de España.<sup>3154</sup> Su objeto era evitar que los bienes inmuebles, o las rentas provenientes de una fundación, salieran de la familia a que habían pertenecido. Los letrados y canonistas criollos que más las analizaron fueron los Pbro. José Felipe Funes,<sup>3155</sup> José León Banegas,<sup>3156</sup> y José Gregorio Baygorrí.<sup>3157</sup> El Pbro. Funes, en un dictamen fechado en 1811, sostenía que mientras en las capellanías, en especial las capellanías eclesiásticas, no existía derecho de representación, y la proximidad del parentesco que regulaba u otorgaba el derecho estaba establecida con respecto al fundador; en los mayorazgos, y según algunos en las capellanías legas, había derecho de representación, y la inmediación del parentesco que decidía en juicio se establecía respecto del último poseedor.<sup>3158</sup> En el litigio entablado a comienzos del siglo XIX entre los concursantes José Gabriel Echenique, Juan Gerónimo Moyano, Tadeo Salguero de Cabrera, y el Rector del Colegio Real de Loreto Leopoldo de Allende y Moyano, a la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera, viuda de Miguel de Ardiles,<sup>3159</sup> no se le ocultaba al Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio Baygorrí,<sup>3160</sup> el mérito de la pobreza como causa prelativa, por encima del abolengo, pues tenía a la vista la obra del canonista Francisco A. Mostazo (1680),<sup>3161</sup> para quien "...en concurso de un rico con un pobre igualmente idóneo, debe el segundo preferirse al primero",<sup>3162</sup> no así en los beneficios curados o que tengan cura de almas.

En cuanto a las derivaciones y mediaciones judiciales de los conflictos producidos en la esfera privada, en Córdoba, la honda y violenta crisis desatada en su Cabildo en 1766, donde se dirimieron acusaciones de nepotismo, estuvo motivada por los enfrentamientos entre el clan de los Echenique y el de los Allende. Dicha crisis política obedeció también en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía, de \$2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.<sup>3163</sup> Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.<sup>3164</sup> Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberón, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.<sup>3165</sup> Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona elevó sus quejas ante las autoridades capitulares hasta lograr el reembolso de la suma correspondiente.<sup>3166</sup>

#### **B-V La práctica del derecho de representación.**

La práctica del derecho de representación tuvo lugar también en el ámbito de lo que luego se dio en llamar el derecho público, por oposición al antiguo derecho privado. Como consecuencia primero de la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes (1782), y segundo de la honda repercusión que produjo el advenimiento de la Revolución Francesa (1789), el eje del debate político en el mundo colonial se trasladó de la discusión acerca de la representación vecinal (capitular), señorial y patriarcal, de origen hereditario o venal, a la noción moderna de diputación,<sup>3167</sup> o representación ciudadana o popular, de origen electoral; y a las nociones más abstractas de voluntad general, opinión pública y soberanía popular.<sup>3168</sup> En el orden imperial-absolutista, no habría existido nunca, si nos atenemos a Bendix (1974), la representación individual, o la noción de ciudadano, y nunca habrían contado los vecinos con una mutua igualdad "...pues los integrantes de las asambleas [cabildos] representaban intereses en juego reconocidos en el sistema, ya fuera en la forma de propiedades o de privilegios profesionales".<sup>3169</sup> Los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos señoriales propios de la modernidad colonial-absolutista la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. A su vez la noción de representación popular y/o diputación estaba basada, según González Echenique (1967), en una concepción de la soberanía popular que excedía el mero marco local y suponía que

"...cada ciudadano entregaba a su representante la parte de soberanía que le competía de modo que el cuerpo legislador junto con los otros poderes del estado, representara a la nación toda y fuese el órgano de ejercicio del poder soberano en el ámbito de lo legislativo".<sup>3170</sup>

Es entonces que las nuevas nociones procedentes de la Francia iluminista y de las lecturas de Voltaire y de Rousseau, acerca de si la naturaleza original del ser humano era individual o colectiva y si la soberanía o autonomía o jurisdicción municipal, en su contexto teórico jurídico-político,<sup>3171</sup> provenía del monarca o del pueblo soberano,<sup>3172</sup> comenzó a ser debatida por las diferentes facciones en que se hallaba dividido el patriciado colonial, incluido el clero y la milicia.<sup>3173</sup> Así como a fines del siglo XIX se discutían arduamente las teorías de De Maistre y de De Bonald,<sup>3174</sup> y a comienzos del siglo XX se polemizaba acerca de las teorías de Spencer y de Comte, a fines del siglo XVIII se debatían en las universidades y seminarios de América las teorías post-aristotélicas, y a comienzos del siglo XIX las teorías religiosas de Lacunza.<sup>3175</sup> En ese entonces, las corrientes de pensamiento post-aristotélicas se dieron con mayor fuerza en el Convictorio Carolino de Santiago de Chile,<sup>3176</sup> fundado en 1778, en reemplazo del antiguo Convictorio de San Francisco Xavier,<sup>3177</sup> donde enseñaban José Perfecto de Salas,<sup>3178</sup> Miguel José de Lastarria,<sup>3179</sup> y Juan Martínez de Rosas.<sup>3180</sup> Estas corrientes de pensamiento se dividían entre los seguidores de los llamados Cínicos,<sup>3181</sup> Cirenaicos,<sup>3182</sup> Estoicos,<sup>3183</sup> Epicúreos,<sup>3184</sup> y Maquiavélicos.<sup>3185</sup> Mientras los Cirenaicos habían absorbido la filosofía hedónica o cínica, los Epicúreos habían absorbido a su vez la filosofía Cirenaica. Pero los Epicúreos modernos, a diferencia de los Maquiavélicos, eran seguidores de la doctrina de la soledad original, renovada por Hobbes y Rousseau. Contra estas doctrinas se habían manifestado en Chile, el Pbro. Mateo Zambrano, pasante de Teología en el Convictorio de Santiago de Chile,<sup>3186</sup> y en el Paraguay el Gobernador y luego Virrey del Río de la Plata Pedro Melo de Portugal.<sup>3187</sup> En efecto, en oportunidad de un conflicto suscitado en 1784,<sup>3188</sup> las ideas ilustradas de una facción política denominada ante-ministerial, liderada por el afrancesado Asesor Letrado Mariano Lorenzo Grambel,<sup>3189</sup> y opuesta a dicho Gobernador, fueron caracterizadas como:

"...propias de aquellos que los Filósofos llaman Animales solitarios, que hacen consistir su felicidad en andar solos confundiendo el derecho natural, juicioso, y que dimana de Dios, con el [derecho] inicuo de los Epicúreos, Zirinaicos y Machiabelos, común a los Brutos, que prefieren el fin particular al bien público,...contrario al de los animales sociables, que la fundan en componer número con sus semejantes, y serles útil".<sup>3190</sup>

## **B-VI Nociones de soberanía municipal.**

Las discusiones alrededor de las nociones de soberanía municipal y del origen laico o profano del patronato o vicariato real no era tampoco de índole metafísica, por cuanto todo el edificio jurídico colonial descansaba en la definición del origen de los poderes administrativo y eclesiástico. En Córdoba, el reformista Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir que los curas párrocos, pese al origen profano del patronato real, recurrieron a las Milicias Provinciales para el cobro compulsivo de los derechos parroquiales.<sup>3191</sup> Asimismo, fue en Salta, en 1792, el primer lugar donde se discutió en forma pública y abierta acerca del origen real o popular de los poderes municipales. La mayoría de los cabildantes habían sido burlados en sus designios por la revocatoria que de las elecciones concejiles hiciera el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila,<sup>3192</sup> natural de Moquegua. Dicho Gobernador había estado apoyado por sus compatriotas los hermanos Fernández Cornejo, también originarios de Moquegua, y responsables conjuntamente con el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero de haber puesto en ejecución en Salta, en 1767, la Real Orden de expulsión de los Jesuitas, acontecimiento que provocó el conocido alzamiento relatado por Acevedo (1969).<sup>3193</sup> Entonces, en representación de los capitulares de Salta, un Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor, el Licenciado Mateo de Saravia y Jáuregui,<sup>3194</sup> cuestionó dicha revocatoria manifestando que los políticos daban diversos orígenes a la facultad que tenían los gobernadores-intendentes de confirmar o revocar las elecciones concejiles. Siguiendo aparentemente al Obispo de Córdoba Fray José Antonio de San Alberto,<sup>3195</sup> quien en 1791 había censurado públicamente a Rousseau,<sup>3196</sup> Saravia sostenía que

"...unos Sectarios de la Ley Regia, y del contrato social sostienen que esta facultad dimana de la reserva que se hizo el Pueblo cuando transfirió la autoridad y jurisdicción al Imperio o Monarquía: otros la hacen desender de los usos y costumbres inmemoriales de algunas poblaciones, como sucede en varias ciudades de España",<sup>3197</sup>

y que si bien la soberanía o autonomía municipal provenía del monarca, los Gobernadores-Intendentes no estaban autorizados a revocar elecciones pues

"...en el sistema de nuestro vasallaje y legislación municipal tienen esta facultad [de elegir sus alcaldes] los pueblos y Cabildos de América por expreso privilegio y concepción de nuestros gloriosos monarcas".<sup>3198</sup>

En cuanto al régimen de renovación de autoridades Saravia expresaba que "...su forma es para proceder colegialmente: de suerte que sus elecciones, acuerdos, y demás actos se constituían por la maior parte [mayoría] de sufragios".<sup>3199</sup> Como respuesta a esta representación, redactada por Saravia, el Gobernador-Intendente Ramón García de León y Pizarro,<sup>3200</sup> aconsejado por su Teniente Asesor Juan Estéban Tamayo,<sup>3201</sup> le advertía al Virrey Arredondo en 1793 (al igual que el Teniente Gobernador Interino de Córdoba

Antonio Arriaga le había prevenido al Virrey Ceballos en 1776 con respecto a la constitución del Cabildo de Córdoba), que Don Mateo de Saravia y Jáuregui

"...ha formado entre los cabildantes de esta ciudad una parcialidad, con la cual no sólo afianza las ulteriores elecciones de oficios concejiles en sujetos de su facción, sino que ha logrado celebrar unos acuerdos, dirigidos a suprimir las más conocidas prerrogativas del empleo de Gobernador Intendente que ejerzo, a deprimir las facultades y opinión del Teniente Asesor [Tadeo Fernández Dávila], nombrado por Su Majestad, a poner en problema la conducta de los Ministros de la Real Hacienda, como Administrador General del Ramo de Sisa, y a sembrar entre los vecinos la semilla de la discordia".<sup>3202</sup>

Para García Pizarro, Saravia lograba mediante su triple condición de abogado, regidor y fiel ejecutor perturbar la sociedad salteña. Como abogado, Saravia "...vierte en sus escritos, y en los que forma a sus clientes, la mordacidad, sin que bastasen a enmendarlo los repetidos apercibimientos que se le han hecho".<sup>3203</sup> Como Regidor, "...seduce a los demás cabildantes, que imbuidos de las máximas de su errada jurisprudencia, acuerdan y determinan con él, o a su influjo cuanto le sugiere el orgullo, la altivez, y el despotismo".<sup>3204</sup> Finalmente, como Fiel Ejecutor, "...se ha arrogado jurisdicción ordinaria, y ha actuado proceso, faltando a las ritualidades del Derecho", por lo que la Real Audiencia de Buenos Aires le suspendió del oficio por dos años.<sup>3205</sup> Con motivo de los cargos que hizo en 1793 el Cabildo al Teniente Asesor Fernández Dávila, Acevedo (1965) nos revela un documento que sostiene que Mateo de Saravia y Jáuregui había logrado que el ayuntamiento salteño estuviere compuesto:

"...de parientes, de parciales y de clientes suyos, por razón de abogado. Don Agustín de Erquicia,...Don Roque de la Cerda,...Don Fernando Torres,...Don Francisco Anse de y Graña,...el Lic. José Gavino Blanco,...Don José Royo Carrillo,...y Don Antonio Pardo [y Santayana]".<sup>3206</sup>

Como resultado de esta realidad, la facción dirigida por Saravia había logrado nuevamente, a comienzos del siglo XIX, la mayoría en las elecciones concejiles, pero la minoría dirigida por el nuevo Gobernador-Intendente Rafael de la Luz y su Teniente-Asesor José de Medeyros,<sup>3207</sup> suegro de uno de los Cornejo, frustró reiteradamente sus ambiciones, con la consiguiente reacción popular manifestada en pasquines escritos en versos.<sup>3208</sup>

## **B-VII Las nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular.**

Por último, en lo que hace a las nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular, la facultad de confirmar o revocar la elección de los representantes en los Cabildos seculares --producto de los fueros, excepciones, privilegios o libertades concedidos a los pueblos y ciudades por los monarcas en tiempos de la conquista, para elegir sus propios alcaldes-- hacía que se discutiera acerca de conceptos tales como: inmediato sucedáneo, respeto a la voluntad popular resultante de las elecciones o, lo que es lo mismo, mayor número de sufragios resultante de la compulsa.<sup>3209</sup> La voluntad popular, tal como se la entendía en el siglo XVII, a juzgar por los escritos de los filósofos y juristas hispanos (Suárez y Mariana),<sup>3210</sup> residía en un estamento local y minoritario de vecinos beneméritos, que se constituía mediante el cumplimiento de una numerosa serie de requisitos legales. Los cargos seculares electivos, como el de los Alcaldes Ordinarios, los Procuradores Generales y los Alcaldes de Hermandad, que no podían ser arrendados ni

subastados por tratarse de cargos de justicia,<sup>3211</sup> venían recayendo en el mundo colonial en beneficio de este patriciado, único en quien podía residir la entonces llamada voluntad popular.<sup>3212</sup> Este filtro, embudo o "cuello de botella" se había logrado mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los elegibles y de los elegidos a un ínfimo núcleo de parientes, lo cual tornaba a los Cabildos en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.<sup>3213</sup> A los efectos de romper estas estructuras, resabios o reminiscencias de un parlamentarismo propio de un orden imperial-absolutista,<sup>3214</sup> la monarquía Borbónica, a diferencia de la dinastía Habsburga, forzó la participación de los peninsulares en la actividad capitular de sus colonias a través de la imposición de una serie de recursos jurídicos, tales como la Real Cédula conocida como la Alternativa,<sup>3215</sup> y detalladas Informaciones de Limpieza de Sangre.<sup>3216</sup>

Desconocemos la existencia de otras prácticas jurídicas y otras nociones que pudiesen revelar la gestación de una esfera pública de parte de los mencionados funcionarios, juristas y letrados que, por el momento, se nos presenta como una fractura jurídica que responde a la necesidad de generar nuevas legitimidades. De cualquier modo, luego de dos siglos, del anonimato en que yacen seguramente otros numerosos escritos de juristas y letrados de la época colonial, creemos haber rescatado del olvido a lo más granado de dicha producción jurídica.

## **Capítulo II-A-3      Grietas discursivas, fracturas literarias y acciones colectivas contra el colonialismo (1764-1810)\***

### **Índice**

- C-I.    Ruptura de estilos poéticos
- C-II.   Decadencia del romancero y auge de la espinela
- C-III. Identificación catártica con el héroe indígena
- C-IV   Poesía contra el fraude electoral en los Cabildos.
- C-V    Intromisión en la esfera de lo militar mediante bandos
- C-VI. Protesta pública o acción colectiva
- C-VII Satirizando la hidalguía presumida
- C-VIII Denuncias poéticas contra la crueldad del poder.
- C-IX   Poesía en clave de contrapunto.

### **C-I.    Ruptura de estilos poéticos**

En este capítulo nos propusimos deconstruir --en el rumbo apuntado por la teoría literaria contemporánea (Cussen, Jauss, Iser, Zimmermann, Bloom)-- los discursos poéticos hallados en la litigiosidad judicial colonial Rioplatense. Este análisis deconstructivo fue practicado para hallar una fractura literaria en el discurso poético que rompiera con los viejos moldes iniciales del Romancero y la poesía estamental heredados del orden absolutista habsburgo, los cuales habían sido trasplantados desde la metrópoli durante la conquista; y que testimoniara el esfuerzo que hubieron de practicar los intelectuales locales para vencer el aprisionamiento de la facultades creativas que ejercía la influencia de la producción canónica europea.<sup>3217</sup> Los discursos poéticos, a semejanza de las formas fonéticas y gramaticales, también nacen, viven y mueren.<sup>3218</sup> Pero dicha fractura fue difícil de visualizar, pues como sostiene Vilanova (1999), en el siglo XVIII

abundaba la superposición de estilos, como el barroco, el neoclásico y el rococó. Esa fractura de estilo poético operaría al decir del afamado crítico de arte Carl Einstein como un “conflicto de formas contra formas”, las que deben contener “...medios susceptibles de modificar la realidad, la estructura del hombre y el aspecto del mundo”.<sup>3219</sup> Para conocer esta fractura hemos verificado cómo cada uno de los cinco niveles de identificación estética (asociativo, admirativo, simpatético, catártico, irónico), investigados por Jauss (1992) interactuaba críticamente con distintos fenómenos políticos, tales como la creciente crisis del orden imperial-absolutista,<sup>3220</sup> y las reformas encaradas primero por la dinastía Habsburga (Reformas Toledanas, Ordenanzas de Alfaro) y más luego por la dinastía Borbónica.<sup>3221</sup>

En el género poético, la teoría literaria reciente ha reconocido el necesario carácter histórico de las piezas y obras literarias y del lugar de la poesía en los procesos revolucionarios,<sup>3222</sup> así como ha observado que las prácticas políticas de los siglos XVIII y XIX se ilustraban poéticamente mediante tropos, conceptos (nobleza, hidalguía, bastardía, plebe, etc.), y rasgos ideológicos claves propios del orden absolutista (señorialismo, patriarcalismo, estamentalismo, corporativismo, prebendarismo, patrimonialismo, mercantilismo, etno-centrismo y nepotismo),<sup>3223</sup> que fueron recepcionados a partir de las líricas clásica, bíblica y renacentista,<sup>3224</sup> y que experimentaron a lo largo de dichos siglos una acelerada transformación y/o transmutación en sus significados y funciones.<sup>3225</sup> La creciente madurez social e intelectual de la clase o elite que luego concibió en toda América la denominada epopeya de independencia,<sup>3226</sup> estaría abonada por la crítica selección que hicieron de tales conceptos y discursos. Ello permitiría desestimar la tesis que niega la existencia de dicha madurez.<sup>3227</sup>

Para analizar entonces la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por las interminables disputas simbólicas o rituales, electorales y anti-fiscales, y contrarias al cerrado comunismo existente, manifestadas en acciones colectivas, donde abundaba la música, el canto, la poesía en décimas, las representaciones plásticas y la burla de los adversarios. En este trabajo hemos recogido un corpus literario compuesto de siete poemas (dos de La Rioja, uno del Tucumán, otro de Salta, y tres del litoral Rioplatense), hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, tres de ellos publicados con anterioridad.<sup>3228</sup>

## **C-II. Decadencia del romancero y auge de la espinela**

Con la decadencia del romancero, se afirmó en España y América el auge de una métrica denominada "espinela" o décima,<sup>3229</sup> inaugurada por Vicente Martínez Espinel.<sup>3230</sup> En la "espinela" cada estrofa debe estar formada por diez versos octosilábicos, es decir por dos redondillas (de cuatro versos cada una) con rima abrazada, y como nexo de unión dos versos de enlace que repiten las rimas última y primera de cada redondilla. El primer verso rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno.<sup>3231</sup> Este tipo de composición logró en España desplazar al romance, para ser luego adoptado en América, provocando con ello una fractura literaria de honda repercusión en la historia Latinoamericana. En el Río de la Plata se hizo popular entre los payadores de ambas márgenes, tanto en las ciudades como en la campaña. Pero la espinela originó discusiones en el sentido que ya con anterioridad se había conocido la estrofa de diez versos llamada décima. Pese a la riqueza de la producción literaria de los siglos XVI y XVII, el siglo XVIII adoleció de una fuerte

decadencia,<sup>3232</sup> de la cual no estuvo exenta la América española, ni por supuesto el Río de la Plata. La degradación intelectual a que había sido sometida la elite literaria española, en los dominios de la idea y de la forma, por influjo del gongorismo, el culteranismo y el conceptismo, habían alcanzado también las costas de América.<sup>3233</sup>

No obstante dicha decadencia, y la crónica recepción de géneros literarios ibéricos, en la América colonial se fue gestando lentamente una peculiar cultura que habremos de denominar hispano-criolla. Vilanova (1999) sostiene con acierto la imposibilidad de calificar estas culturas con la identidad geográfica local pues ellas pertenecían a un espacio continental, mientras que las conocidas como culturas nacionales recién asomaron bien entrado el siglo XIX. En ese espacio continental existieron fenómenos culturales, políticos y sociales que fueron comunes a todos sus integrantes. Es conocido que en ocasión de órdenes y nombramientos hechos por la Corona los vecindarios provinciales de todos los rincones Virreinales aprovechaban para manifestar su disenso con la opresión colonial, mediante pasquines y décimas anónimas compuestas de versos tenidos por "difamatorios" e "insolentes".<sup>3234</sup> Fue la producción poética --no sólo en el género gauchesco-- la que más profundamente llegó a la plaza pública y la que más hondo caló en la conciencia popular.<sup>3235</sup> Dicha producción poética se presta a la comparación y al análisis de las opciones intelectuales y artísticas adoptadas por la elite cultural hispano-criolla del interior del espacio colonial rioplatense, en el siglo previo a la declaración de la independencia.<sup>3236</sup> Entre las opciones intelectuales que dieron lugar a esta embrionaria cultura hispano-criolla habremos de indagar el tipo de público al cual apelaron y la naturaleza de los discursos ideológicos, literarios y políticos elegidos, y en cuanto a las artísticas investigaremos los personajes, los temas o motivos, los niveles de identificación estética y las métricas adoptadas.<sup>3237</sup> De acuerdo con Warburg (1966), no importa cuan irrelevante sea desde el punto de vista estético, una obra de arte puede ser significativa para el historiador porque atestigua determinadas relaciones culturales.<sup>3238</sup>

A semejanza de los elementos paródico y grotesco prevalecientes en los géneros artísticos del Renacimiento,<sup>3239</sup> cuando el nivel de identificación estética estuvo marcado por lo que Jauss (1992) denominó la identificación irónica, presente en las obras de Cervantes y de Rabelais; observamos que en la poesía colonial tardía también predominó la parodia y el realismo grotesco.<sup>3240</sup> Aplicando los puntos de vista de Aminzade, citados por Sewell (1990) y Tarrow (1993), en el repertorio de acciones colectivas propias del orden imperial-absolutista se contaban las peticiones, serenatas y cencerradas, preñadas de burla y escarnio hacia las autoridades acompañadas con música, canto y representaciones plásticas.<sup>3241</sup>

### **C-III. Identificación catártica con el héroe indígena**

En el caso de Cochabamba, en 1780, el Alcalde Ordinario Francisco Mendivil, descubrió que entre las seis y las siete de la mañana habían amanecido fijados en las paredes numerosos pasquines. Estos pasquines, tal como lo revela el apéndice A, denunciaban en versos octosilábicos el establecimiento de la Aduana, con el aumento del 2%. Es de destacar que esta grave presión fiscal perjudicó no sólo a los comerciantes criollos o españoles sino también a muchos indígenas.

En el caso de Oruro, Lewin (1957) nos cuenta que en 1782 los hermanos Jacinto Rodríguez de Herrera,<sup>3242</sup> y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,<sup>3243</sup> personeros de los criollos, fueron excluidos del Cabildo por su odio a los peninsulares, desatándose con ello

su activa participación en la famosa revuelta indígena.<sup>3244</sup> En el caso de Potosí, sus Regidores Joaquín de la Quintana,<sup>3245</sup> Juan de Ybieta y Endeiza,<sup>3246</sup> y Gregorio Barragán,<sup>3247</sup> enfrentados a la facción local liderada por el Coronel Indalecio González de Socasa,<sup>3248</sup> compuesta a su vez por los azogueros Luis de Orueta,<sup>3249</sup> Antonio Vargas y Flor,<sup>3250</sup> y Pedro Antonio Azcárate,<sup>3251</sup> y por los comerciantes Potosinos Manuel Bulúcu,<sup>3252</sup> Juan Bautista Elorreaga,<sup>3253</sup> Nicolás Ponte,<sup>3254</sup> Nicolás de Oliden,<sup>3255</sup> Francisco Zenavilla,<sup>3256</sup> Joaquín Obregón Cevallos,<sup>3257</sup> Martín de Gainza,<sup>3258</sup> y el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,<sup>3259</sup> manifestaban en 1799

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político y público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".<sup>3260</sup>

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente en las asistencias y actos públicos".<sup>3261</sup>

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe [Gobernador-Intendente], y su Asesor, viéndose los suplicantes en todo en la dura necesidad o de suscribirles, contra su propio dictamen, o de sufrir los fatales resentimientos a que hasen en el día una dolorosa experiencia".<sup>3262</sup>

Con motivo de las rebeliones indígenas del Alto Perú (1782), acontecidas a posteriori de la Expulsión de los Jesuitas (que a continuación vamos a desarrollar), los niveles de identificación estética en el género poético giraron alrededor de un nivel que Jauss (1992) denomina catártico, por liberar a la reflexión estética de la fuerza de las pasiones.<sup>3263</sup> El caso más relevante de este género poético en el Río de la Plata fue el del poeta paraguayo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.<sup>3264</sup> Como prueba de hechos de rebeldía denunciados en un expediente de la serie de Hacienda --donde se halla un Informe elevado en 1784 por el Cabildo de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba-- se encuentra un pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que denominaremos para su reconocimiento posterior "*Décimas de Protesta*". Su autor, un verdadero precursor de la poesía de la emancipación, que probablemente influyera en la letra del himno nacional argentino, no sería otro que el mismo Ortiz de Ocampo que dos años después compuso unos versos en décimas denominados *Décimas Correctivas*, ya mencionadas.

Dichas "*Décimas de Protesta*" revelan en su autor no sólo un notable dominio de la métrica y de la realidad política vigente en las colonias de América, sino también una identificación catártica con el héroe indígena por el yugo que sufría en el Alto Perú. En su primera estrofa el autor introduce el tema del cristianismo, a través del decálogo bíblico (versos 9 y 10 de la primera estrofa), ligándolo en la segunda estrofa con la denominación de un tipo de tributo: el quinto real (verso 1):

I

1. "De la plata todo el ser,

2. es hacer noble y pesado,
3. que siempre se han reputado,
4. las injurias del poder:
5. tal vez puede suceder,
6. el que la quieran quitar,
7. la voz han de levantar
8. con acordes sentimientos
9. y de los Diez Mandamientos
10. el quinto no han de guardar.

- II
1. El quinto, pecho maldito,
  2. de la Aduana el seis por ciento,
  3. Cochabamba no da asiento,
  4. con sangre la lloró Quito,
  5. Arequipa ya alza el grito,
  6. Charcas ya puede gritar,
  7. de Madrid el Ejemplar,
  8. es el Ministro primero,
  9. que hace a Carlos Tercero
  10. de cuanto quiere robar.

Su autor también revela en la tercera estrofa un compromiso sin igual con la sublevación acontecida en el Alto Perú. Matando Corregidores, dice el poeta, se evitarán los Oidores las quejas de los indios. Efectivamente, Serulnikov (2006) nos informa que fue la colusión entre Oidores y Corregidores lo que desató la rebelión.<sup>3265</sup>

- III
1. De los Indios lo alegado,
  2. si entendieran sin pasión
  3. degollarán la ocasión,
  4. de quantos han degollado,
  5. Con la Justicia, cuidado;
  6. no se abandonen quejas,
  7. teniendo largas orejas,
  8. que implican ser Oidores,
  9. matarán Corregidores,
  10. y se evitarán de quejas.

En la estrofa que sigue, el autor parece exculpar al Rey de España de la matanza, atribuyendo la misma a la burocracia colonial. En la cuarta estrofa completa su pensamiento con reflexiones acerca del régimen de tributos.<sup>3266</sup>

- IV
1. Y de la crueldad atroz,
  2. que de Charcas se relata,
  3. sin culpa llora la plata,
  4. culpa de los que mataron
  5. los que guardan la Real Caja,
  6. y de tributos y tasas,
  7. no es cosa que manda el Rey,
  8. no es de razón, ni de ley,
  9. antes de injusticia pasa.

- V
1. Viendo tributos doblados,
  2. al clamor de tantas gentes
  3. están los pueblos tumbados,
  4. desde el Cuzco coligados,
  5. advenir podéis vosotros,
  6. que de Lupa, ya vos, otros,
  7. la muerte quieren vengar
  8. pues no han de resucitar,
  9. muriendo todos vosotros".<sup>3267</sup>

Y también sufría esta burla el Cabildo de Tarija, pues con motivo de las elecciones de 1803, los vecinos del lugar repudiaron la venta de los cargos concejiles operada en la Real Audiencia de Charcas, haciendo que los regidores perpetuos José María Dávalos,<sup>3268</sup> Ignacio de Echazú,<sup>3269</sup> y Juan de Dios Evia y Baca,<sup>3270</sup> se quejaron que habiendo comprado los oficios concejiles "...fueron injuriosamente despojados y privados de voz y voto en el escrutinio que precedió las elecciones de 1803".<sup>3271</sup> La causa que impulsó esta acción colectiva "...fueron las desavenencias y discordias de aquel Cabildo, originadas en parte de las facciones de familia".<sup>3272</sup> A mas de este impedimento, los Regidores Benito López y José Básquez de Reyes, habían obtenido los oficios que compraron, "...con notorio vicio de ilegitimidad, y contra la forma prescripta por las leyes" al no haber justificado

"...si son naturales de estos Reynos cristianos, y de que raza o linaje, cuyos requisitos y calidades, que son de previa necesidad, y forma esencial, hallaron arbitrio para que se les dispensase, y supliesen con una fianza, al pretexto de la guerra".<sup>3273</sup>

Sin embargo, un lustro más tarde, en febrero de 1807, los cabildantes de Tarija obtuvieron por Real Cédula que su jurisdicción se desprendiera de la Gobernación-Intendencia de Potosí y del Arzobispado de Charcas, pasando a depender de la Gobernación-Intendencia y del Obispado de Salta.<sup>3274</sup>

#### **C-IV Poesía contra el fraude electoral en los Cabildos.**

Entre las parodias y sátiras grotescas difundidas en el antiguo Virreinato del Río de la Plata resaltaban aquellas surgidas de las consecuencias del fraude electoral practicado en los Cabildos. En la gestión de la administración capitular, Salta fue una de las provincias donde el nepotismo y el racismo, practicados en las elecciones concejiles, amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco Antonio Gonsález de San Millán,<sup>3275</sup> el socio y amigo del Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui,<sup>3276</sup> el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila,<sup>3277</sup> impugnó las elecciones, so pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y Toledo Pimentel] y un concuñado [Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]".<sup>3278</sup> Por otro lado, la mujer de San Millán, María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel,<sup>3279</sup> era sobrina carnal de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Ávila,<sup>3280</sup> y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era concuñado de San Millán y del comerciante Pedro José de Ibazeta,<sup>3281</sup> por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa y Toledo Pimentel.<sup>3282</sup> También viciaba la elección el hecho de haber votado a su favor Don Lino

Rosales.<sup>3283</sup> Este último, aunque no tenía un parentesco directo, tenía amistad y cierta relación de parentesco con todos ellos, por cuanto Don Bonifacio Toledo,<sup>3284</sup> hermano de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Ávila, era su concuñado y tío de las mujeres de Francisco Antonio Gonsález y de Apolinario Usandivaras.<sup>3285</sup>

Tres años antes del colapso imperial, en 1805, el bloque patricio liderado por el Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui,<sup>3286</sup> y su aliado el ex-Regidor Francisco Antonio Gonsález y San Millán, insuflados de teorías aparentemente más conservadoras, era desplazado del poder capitular por un bloque liderado por el Gobernador-Intendente Rafael de la Luz,<sup>3287</sup> y su Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila,<sup>3288</sup> los cuales se habían negado a confirmar la fórmula electa por la mayoría del cabildo, sustituyéndola por la que resultó minoría en la persona de José Uriburu,<sup>3289</sup> e integrada por españoles europeos, de teorías aparentemente más liberales.<sup>3290</sup>

Los documentos que relatan las vicisitudes ocasionadas por la difusión de una serie de pasquines --originados en la burla del resultado de dichas elecciones-- por parte del Gobernador-Intendente son parcialmente conocidos.<sup>3291</sup> No bien el Gobernador-Intendente confirmó a quienes no habían sacado la mayoría de votos en la elección de oficios concejiles de 1805, se empezaron a difundir en Salta diversos pasquines alusivos a los hechos. El primer pasquín de que se tuvo noticia, según el testigo José Eugenio Tirado, "...empezaba con el título 'Aviso al Público', tratando de Robespierre al Sr. Asesor Juez [José de Medeyros] de esta Información",<sup>3292</sup> y el que le siguió en seguida, compuesto de algunas décimas y una quintilla, empezaba sin ambages con una acusación lapidaria: "De hombres sin religión, como es el Gobernador [Rafael de la Luz] y su Teniente Asesor [José de Medeyros]".<sup>3293</sup> En este segundo pasquín, Tirado nos revela que a más de los dos referidos funcionarios, se nombraba con sorna y escarnio al R.P. Felipe Antonio de Iriarte,<sup>3294</sup> a Don José Tomás Sánchez, a José Gabino Blanco, a Don Antonio Aguela y a Matías Gómez Linares, todos ellos vinculados con las autoridades del Cabildo (encabezadas por José Uriburu) electas por el menor número de votos y confirmadas por el Gobernador-Intendente. Al menos uno de ellos, Sánchez, había sido previamente partidario de Don Mateo de Saravia y Jáuregui. Asimismo, Tirado declaraba que quien le leyó el pasquín, probablemente su propio autor, fue el Clérigo Pbro. Don Santiago Arias Velásquez, o Arias y Saravia,<sup>3295</sup> quien le preguntó al declarante

"...si había llegado a su noticia el dicho pasquín en verso, y como le dijese que lo tenía, pero que no lo había oído leer, prontamente sacó del bolsillo el dicho Don Santiago el papel indicado, se lo leyó caminando siempre a paso largo, conociéndose que lo había leído muchas veces, o lo sabía de memoria, y se lo volvió a guardar".<sup>3296</sup>

Por todas las circunstancias de lo que llevaba declarado, Tirado infería que los autores de tan insolentes papeles "...no pueden menos que ser alguno de los Saravia, o de su pandilla, como que son los resentidos de la confirmación hecha por el Sr. Gobernador".<sup>3297</sup> Finalmente, el tercer pasquín de que se tuvo noticia, compuesto de cuatro décimas y cuatro quintillas, y que es el único que según tengo entendido ha llegado a nuestros días, publicado por Acevedo (1965), fue escrito en mofa de la minoría del Cabildo, con motivo del fallo de la Real Audiencia de Buenos Aires que derogaba la decisión del Gobernador-Intendente. Este tercer pasquín, titulado "Lamentos de un Capao", rezaba:

- I
1. "Qué es lo que miro en el día,
  2. cabildo ilustre, qué es esto:
  3. como feneció tan presto
  4. tu gallarda fantasía?
  5. Dónde está esa valentía
  6. que ostentabas tan ufano,
  7. que con absoluta mano
  8. pensabas cantar victoria
  9. y hoy se convierte tu gloria
  10. en un desprecio inhumano.

1. Ven acá, Gobierno
2. qué te ha sucedido
3. dónde está el amparo
4. que me has prometido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

En este tercer pasquín, se nombraba con sorna tanto a José Uriburu como a José María de Nevares.

- II
1. El señor Gobernador
  2. se miró en un gran aprieto
  3. porque no ha sido sujeto
  4. para sostener su humor.
  5. Por fin cayó en el error
  6. que le dictó su porfía,
  7. pero al cabo llegó el día
  8. que con sumiso escarmiento
  9. tribute su rendimiento
  10. a Calixto y Soberanía.

1. Ven acá, Uriburu,
2. qué te ha sucedido,
3. bien con la Cauñita
4. te habrás divertido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

- III
1. Temerosos y sorprendidos
  2. Gobernador y teniente
  3. sentían continuamente
  4. sus arriesgados excesos.
  5. De costas quinientos pesos
  6. tienen los dos que sufrir
  7. y ambos a dos que sentir
  8. el laudo de una sentencia
  9. que ha dirigido la Audiencia
  10. por Saravia, el adalid.

1. Ven acá, Nevares,
2. qué te ha sucedido,

3. ya te han dado el pago
4. que no has merecido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

- IV
1. Ni Cicerón con su prosa
  2. Ni Virgilio con su musa
  3. a nadie, a ninguno excusa
  4. de acción tan chistosa.
  5. Ello es cosa vergonzosa
  6. ser cobarde en un oficio
  7. pero si con artificio
  8. abusas tu privilegio
  9. habéis hecho un sacrificio
  10. con que me has rotpido el juicio.

1. Vengan los restantes
2. de que no me olvido
3. y digan a voces
4. lo que ha sucedido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc." <sup>3298</sup>

El fallo de la Real Audiencia fue públicamente celebrado entre otros muchos electores y electos por un grupo de fuertes mercaderes compuesto por Manuel Antonio Texada,<sup>3299</sup> Juan Nadal y Guarda,<sup>3300</sup> Domingo Cardo (factor de Manuel Antonio Boedo), Julián Gregorio de Espinosa, Pedro Martínez de Vinuesa, Pedro José de Ibazeta,<sup>3301</sup> Lino de Rosales,<sup>3302</sup> Marcos Castellanos y Saravia,<sup>3303</sup> y Pedro Arias Castellanos, y su música y canto financiada por Isidro Matorras.<sup>3304</sup> Es indudable, decía Tirado, con respecto a los integrantes de esta última movilización callejera, que los actuales capitulares, no sólo "...han demostrado vanidad y alegría por el vencimiento, sino que también han hecho farsa y pifia de los antecesores", habiéndole también asegurado Pedro Pablo Saravia (hermano de Mateo, Mariano, y Santiago de Saravia y Jáuregui) al declarante "...que al día siguiente de la reposición habían amanecido colgados en la puerta del que fue alcalde de Primer Voto Don José de Uriburu unos testículos de carnero, u otro cuadrúpedo, lo cual sabía muy bien el Don Pedro Pablo por ser de la familia".<sup>3305</sup> Concluía su declaración Tirado, manifestando que lo que él había dicho acerca de los Saravia, autores de los pasquines, "...no se entiendan ni incluyen el Coronel Pedro J. Saravia,<sup>3306</sup> ni sus sobrinos Don Martín, ni Don Santiago Saravia, cuja imparcialidad y honroso modo de pensar es bien notorio".<sup>3307</sup>

Asimismo, en otro caso suscitado en Salta, en 1805, por el Regidor Antonino Cornejo y de la Corte,<sup>3308</sup> acerca de una información sumaria y secreta,<sup>3309</sup> sobre el linaje de Pedro Antonio Ramírez de Obejero,<sup>3310</sup> el Síndico Procurador General Pedro Antonio Arias Velásquez,<sup>3311</sup> miembro de un antiguo e influyente clan familiar, desplazado por el clan de los Fernández Cornejo, cuestionó al Teniente Asesor José de Medeyros,<sup>3312</sup> precisamente suegro de un hermano del Regidor Cornejo. El cuestionamiento de Arias Velásquez obedecía al intento de Medeyros de tomar él mismo dicha Información, cuando el Regidor Antonino Cornejo era "... cuñado de su hija y come con el mismo Asesor".<sup>3313</sup> Si para obviar estos inconvenientes la Ley de Indias establecía que nadie fuere abogado, donde su padre o suegro fuese Oidor, cuanto más perjudicial sería entonces, se preguntaba Arias Velásquez "...que el Dr. Medeyros sea único Asesor y Auditor de Guerra, donde

tiene tantas conexiones, y su yerno Don Juan José Cornejo es Comandante y ejerce jurisdicción?".<sup>3314</sup>

### **C-V Intromisión en la esfera de lo militar mediante bandos**

Al compás de los cambios generados en la sub-metrópoli porteña, como consecuencia de la invasión napoleónica, la ruptura del equilibrio del poder Europeo y la reconquista de Buenos Aires, pareciera ser que en Santiago del Estero algunos vecinos, especialmente los miembros de la Casa de los Palacio, liderada por el ex-Alcalde Manuel de Palacio y Amavíscar,<sup>3315</sup> tomaron nuevos bríos. Tan violento fue este contraste, que el Comandante de Armas y Sub-delegado de Real Hacienda Juan José Iramain,<sup>3316</sup> le manifestaba al nuevo Virrey Santiago de Liniers que el poderío de Palacio "...llega más allá de la esfera de Alcalde ordinario", pues mediante bandos se introducía en la esfera de lo militar, entendiéndose por ello las milicias provinciales. Lo mismo ocurría con Don Joseph Frías,<sup>3317</sup> quien le manifestaba al Gobernador-Intendente de Salta que los Palacio "...con una notoria injusticia al mérito de otros vecinos, no an echo más que acomodar en los empleos públicos, a todos aquellos sus parciales, y que son [sus] deudores, o dependientes...".<sup>3318</sup> Así lo eran el Alcalde electo de primer voto Don Pedro Ignacio de Urrejola,<sup>3319</sup> el de segundo voto Don Lorenzo Unzaga,<sup>3320</sup> y el Procurador electo Don Félix Sánchez

"...sin que para más demostrar su coligada subordinación, haigan trepido en elegir para Alferez Real a un hijo de la misma Casa Don Santiaguito Palacio, joven y aún bajo la patria potestad, que apenas podrá contar cosa de 21 años, postergando a este otro su hermano de mayor edad y vecino".<sup>3321</sup>

Desconfiando de su gestión con el Gobernador-Intendente, Frías eleva una semana más tarde al Virrey Liniers un oficio donde le revela que

"...hace tiempo que este Pueblo se halla vajo la opresión de un partido dominante, que apoderado sucesivamente de todo el gobierno de la República, distribuye los empleos a su antojo, resistanlo o no, las leyes, sean dignos o indignos los sujetos".<sup>3322</sup>

El responsable de esta opresión era para Frías, Don Manuel de Palacio que "...aunque ya es fallido, dejó vinculada en la posteridad de sus dependientes y deudores a su Casa, por perpetua memoria, la infalible observancia de tan perjudicial sistema".<sup>3323</sup>

### **C-VI. Protesta pública o acción colectiva**

La burla y el escarnio de las autoridades fueron un lugar común en las protestas acontecidas durante el orden imperial-absolutista. En el Tucumán, la resistencia de los patriciados urbanos se manifestó primero en 1752, en la oposición elevada al Marqués de Valdelirios contra el Tratado de Permuta (1750), por la cual se entregaba a la corona de Portugal los territorios pertenecientes a los Siete Pueblos de las Misiones Orientales,<sup>3324</sup> y más luego, en 1772, en una rebelión anti-fiscal, con motivo de la implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes.<sup>3325</sup> En oportunidad de la implantación de dicha Real Renta, gran parte del patriciado Tucumano, bajo la dirección del poeta Francisco Camboño,<sup>3326</sup> orquestó una protesta pública o acción colectiva contra el nuevo Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes.<sup>3327</sup> Camboño era yerno del Subdelegado de Real Hacienda José

Silvestre de Ojeda,<sup>3328</sup> estrechamente vinculado a la elite Tucumana. También era concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y asociado a la flor y nata del Tucumán colonial en la orquestación de dicha protesta. En efecto, en ocasión de arribar a Tucumán, procedente de Córdoba, en junio de 1772, el Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo,<sup>3329</sup> un hombre de quijotesca figura, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, hombre bajo y rollizo, se desató una manifestación popular que bien podría ser considerada como el primer "tucumanazo" de su historia. En unas coplas formadas por ocho octavillas, cuyo aparente autor fue Francisco Camboño, publicadas en forma de bando, que se fijaron repetidas veces en las puertas de la casa del ex-Administrador de la Renta de Tabaco Coronel Manuel Estéban de Castro,<sup>3330</sup> donde transitoriamente moraban Salcedo y Romero, se recepcionaron burlescamente, por primera vez en nuestro país, las menciones del Quijote y de Sancho Panza. Según Saldías (1893), citado por Apraiz (1905) y Montero Reguera (1992), al Quijote lo habían hecho suyo las Repúblicas de habla castellana porque encarnaba las nociones de democracia y libertad, "...asegurando que hacia 1810 era el más popular de todos, el que mas leían y releían los hombres de la revolución".<sup>3331</sup>

La difusión de coplas y versificaciones con discursos políticos de protesta, se remontaba a la oportunidad en que se expulsó a los Jesuitas.<sup>3332</sup> A la par de insultarlos "...hasta cargar las puertas de gruesos maderos y cabezas de ganado vacuno con aspas, executándolo a todas horas de la noche", Salcedo y Romero fueron amenazados con que "...si no salía de la Ciudad en aquella noche, a la siguiente le sacarían en una carreta, y atarían en el rollo".<sup>3333</sup> El rollo era la columna de piedra que en cada ciudad oficiaba de insignia de jurisdicción, y que en muchos casos servía también de picota.<sup>3334</sup> El pasquín que se arrancó del rollo --cuyo autor a juzgar por las denuncias del abogado Juan José Mariano Barón del Pozo,<sup>3335</sup> agente del Gobernador de Salta, fue Francisco Camboño, de quien se carece de noticias acerca de su actuación posterior--<sup>3336</sup> consistía de ocho octavillas, que amanecieron fijadas en las puertas de la morada del Administrador Coronel Castro.

En la primera redondilla de la quinta octavilla Camboño se refiere a la algarada ocurrida en Tucumán con motivo de la llegada de Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por la plaza y calles públicas una multitud encabezada por Diego Sabando,<sup>3337</sup> Juan Silbestre Deheza y Helgueros,<sup>3338</sup> Martín León García,<sup>3339</sup> Juan José de las Muñecas,<sup>3340</sup> el Teniente Coronel de Milicias de Santiago del Estero Martín Ángel Barón o Varón,<sup>3341</sup> Pedro Antonio Aráoz,<sup>3342</sup> "...un Platero llamado Casiano, un Don Manuel que ignora el testigo su apellido [pero que más que seguro se trataba de Manuel Padilla],<sup>3343</sup> Capitán de forasteros, y uno de los músicos llamado Juan Félix el Violinista,...con Bulla, Algazara, y Gritería", repudiando al Estanco de Tabaco, y acompañando al volver de San Francisco "...una carreta destoldada, iluminada, tirada de bueyes, y en ella un coro de música compuesto de varios instrumentos".<sup>3344</sup>

Este texto de Camboño, pleno de un nivel de identificación irónico, se inicia en su primera octavilla con admiración y alabanzas al cabildo, al gobernador, al vecindario, al Procurador, y al gremio de comerciantes peninsulares.<sup>3345</sup> Esta actitud era una clara afirmación de localismo y de antagonismo hacia la intervención de la instancia administrativa Cordobesa, ajena a la jurisdicción Tucumana. Reflejaba el pasquín la cuasi-unanimidad de la protesta, pues menciona en sus versos la presencia del Gobernador de Salta, el Cabildo, y todo el vecindario menos tres vecinos, y al entero gremio de los comerciantes forasteros, que "...en esta ocasión" había actuado con sensibilidad popular:

- I
1. Viva el Ilustre Cabildo
  2. Viva su Gobernador
  3. Viva el Noble vecindario
  4. Viva su Procurador
  5. Viva el gremio forastero
  6. pues mostró en esta ocasión
  7. mucho afecto a la Ciudad
  8. gran odio, a la sin razón

En su segunda octavilla, Camboño hizo mención de lugares históricos y puso límites a sus apologías y alabanzas denunciando con epítetos personales la calidad desleal de un par de vecinos.<sup>3346</sup> Uno de ellos fue el Gobernador de Armas Fermín Vicente Tejerina,<sup>3347</sup> y el otro un sujeto apodado el "Tuerto Veridicón", "...opuestos al Tribunal de Gedeón", es decir a quienes en Tucumán representaban metafóricamente a aquel Juez del Antiguo Testamento que habiendo triunfado militarmente contra los enemigos del pueblo Judío rehusó la corona hereditaria.<sup>3348</sup> El primero, era un fuerte comerciante en efectos de Castilla, procedentes de Buenos Aires, adonde viajaba con asiduidad, y asimismo era suegro del gallego Manuel Posse.<sup>3349</sup> Del segundo, aún no hemos podido descubrir su identidad. Ambos estaban seguramente ligados a los intereses de la Administración de la Renta del Tabaco con sede en Córdoba. Reza dicha octavilla:

- II
1. Viva todo el vecindario
  2. dije mal, pongo ezepción
  3. en tres que fueron opuestos
  4. al Tribunal de Jedeón
  5. estos son, Fermín Vicente
  6. y el Tuerto Veridicón
  7. que han mostrado a la Ciudad
  8. tenerle mucha adversión

En la tercera octavilla además de introducir las parodias del Quijote y Sancho Panza para parangonarlas satíricamente con Salcedo y con Romero y Pontero, incorpora la mención de un hechicero inglés del siglo VI llamado Merlín mencionado por Cervantes, el mismo que introdujo al Quijote en la Cueva de Montesinos.<sup>3350</sup>

- III
1. Desgraciado Don Quijote
  2. a donde va tu destino
  3. Donde te lleva tu ado
  4. qual tu Pensamiento ha sido
  5. Sancho Amigo donde bas?
  6. que estrella aquí te ha traído?
  7. pues biniste a dar en manos?
  8. Del gran merlín forajido

- IV
1. Andantes tened el Buelo
  2. reprimid un poco el Brío
  3. Sofrenad a Rosinante
  4. y prestadme atento oydo
  5. Abeis de saber señores

6. Amo y escudero mío
7. que estoy lleno de cuidado
8. Por ciertas cosas que he oydo

En la quinta octavilla Camboño se refiere de nuevo a la algarada ocurrida en Tucumán con motivo de la llegada del Coronel Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por la plaza y calles públicas una multitud encabezada por lo más granado de su elite patricia, cuyos integrantes ya han sido detallados. Y en la misma octavilla, así como en la sexta, Camboño se refiere a la elección del Tuerto Veridicón como confidente, a quien apoda Longinos (por aquel soldado romano ciego que con su lanza abrió el pecho de Cristo, y que salpicado con la sangre de este último recobró milagrosamente la visión), para identificar quién era quién en el Tucumán de ese entonces.<sup>3351</sup>

- V
1. Me han dicho estáis quejoso
  2. Porque algunos han salido
  3. Lo queando por la Ciudad
  4. metiendo mucho ruido
  5. me han dicho que por el miedo
  6. Atajastes a Lonjinos
  7. Para hazeros compañía
  8. Y conocer los vecinos

- VI
1. Mal testigo atajado
  2. quizás no habréis advertido
  3. que no tiene mas que un ojo
  4. y otro le tiene basío
  5. Pero aunque tubiera dos
  6. Es su dicho tan mal dicho
  7. Que nadie le ha de creer
  8. aunque le bea en un nicho

En la séptima y octava octavillas Camboño se limita a intimidar al Coronel Salcedo y al escudero Romero con las malas consecuencias de su eventual obstinación ironizando con las ejemplares experiencias sufridas en sus aventuras por el Quijote y Sancho Panza y con las vacunas aplicadas por el Hospital San Juan de Dios contra la viruela:

- VII
1. Cortad vuestro airado buelo
  2. dad curso a vuestro destino
  3. Proseguid vuestra carrera
  4. Dejad este desatino
  5. No tropieze Rosinante
  6. No pegue el ruvio algún brinco
  7. que queden Quijote y Sancho
  8. Con Inflamación de osico

- VIII
1. Vete Quijote a la Mancha
  2. Que si siempre estas arisco
  3. Te he de poner la Barchilla
  4. De mi Padre San Francisco

5. Tu Sancho be a tu destino
6. Y sino te juro a Dios
7. Te he de encajar la geringa
8. Del Señor San Juan de Dios=

Al final de las octavillas una calavera precede a los tres versos siguientes:

1. sino te bas=
2. así te verás
3. y en la Matriz quedarás.<sup>3352</sup>

Mas la protesta no quedó en poesías, pues en la mañana del 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, aparecieron en la Plaza pública dos voluminosas y grotescas efigies o estatuas, que permanecieron colgadas hasta después de la Misa Mayor, a la que había concurrido el Alcalde de Primer Voto. Al estilo de las imágenes procesionales profanas -- que en España eran paseadas en carromatos en los días de carnaval, y también en las colonias inglesas de Nueva Inglaterra--<sup>3353</sup> esas dos estatuas o figuras estaban "...colgadas de las argollas o cadenas, que están pendientes del elevado y vistoso Rollo, que está colocado en medio de la referida Plaza".<sup>3354</sup> A juzgar por el testimonio que el propio Salcedo produjo las estatuas o imágenes de bulto "...se asimilaban la mayor a mi Persona, y la otra menor, a Don Dionisio Romero y Pontero, que venía en mi compañía, las que estaban adornadas a lo militar, con peluca, remedando el vestuario, que regularmente traíamos,...el de uniforme de Coronel de Milicias desta".<sup>3355</sup> Para más satirizar al Administrador y su acompañante las dos grotescas estatuas "...tenían en las manos, la una un Frasco, o Bote de guardar Tabaco en Polvo, y la otra un mazo o manojo del de Rama remedado y ambas figuras con varios rótulos y letreros".<sup>3356</sup> Escandalizado y horrorizado porque permaneciese abierto al público un espectáculo tan "irregular y extraño", donde

"...todas clases, estados, y sexos, vieron, reconocieron y se acercaron a dichas estatuas, sin que hubiese, quien las quitase, o se atreviese a ello, con concurrencia de muchachos y gente plebe continúa, jugando y gritando, con las propias estatuas".<sup>3357</sup>

Salcedo tuvo que hablar con Pedro Antonio Aráoz, que se hallaba con la vara en depósito de Alcalde de segundo voto, para que descolgara las insultantes estatuas.<sup>3358</sup> Como vemos, en este singular caso la poesía de protesta estuvo acompañada por una representación plástica, sin precedentes en la historia colonial.

Aparentemente, en el caso específico ocurrido en Tucumán la protesta tuvo sus frutos, por cuanto Salcedo debió marcharse sin cumplir su misión.<sup>3359</sup> A la luz de lo afirmado por Gruzinski (1991), esta acción colectiva se emparentaría con las fiestas campesinas típicas del orden renacentista-absolutista, en las cuales la música, el ruido y la intoxicación alcohólica "...eran ocasión para la reafirmación de una identidad colectiva a escala de pueblo".<sup>3360</sup>

## **C-VII La sátira de la hidalguía presumida**

Cuando el nivel de identificación estética con el héroe criollo o mestizo o con el héroe indígena estuvo marcado por lo que Hernández Sánchez-Barba (1978) denomina la justificación del honor o de la hidalguía de la propia sangre (presentes en toda la obra del Inca Garcilaso),<sup>3361</sup> advertimos que en la poesía colonial tardía --a diferencia de la poesía

barroca y renacentista del Siglo de Oro-- predominó una recepción estética contradictoria, que en términos de Jauss (1992) podría definirse como una mezcla de una identificación simpatética (e.g.: elogio de la nobleza adquirida) con una identificación irónica (e.g.: sátira de la hidalguía presumida). Este fue el caso del mestizo Paraguayo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán, por cuanto componía décimas cargadas de un discurso político-ideológico, seguramente condicionadas por la estructura señorial del clan familiar al cual él mismo perteneció.

Entre las diferentes causas que Ocampo había defendido se encontraba a fines del siglo XVIII: la lucha contra la subordinación del Cabildo de La Rioja a la Gobernación-Intendencia de Córdoba (1759); la lucha contra la presencia de los administradores de la Renta del Tabaco y Naipes y los receptores de la Sisa y la Alcabala, nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, por lo general peninsulares (1772); y la lucha contra el envío de milicias para reprimir la sublevación de Tupac Amaru (1782). La circunstancia que Ocampo Ysfrán fuera un mestizo, hijo adulterino de un miembro de la élite riojana; que provocara en 1759 tumultos en la milicia Riojana, a raíz de lo cual fue desterrado a la vecina ciudad de San Juan; y que alcanzara en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias locales, le otorga a su caso un matiz de especial relevancia.<sup>3362</sup> Don Andrés había nacido en Asunción en 1725 del ayuntamiento del General Andrés Ortiz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fue educado como un hijo mas, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas.<sup>3363</sup> Los mestizos como Ysfrán fueron, al decir de Romero (1976), "...el elemento corrosivo del orden formal de la sociedad barroca de Indias, el que minaría la sociedad dual urbana".<sup>3364</sup> Su padre, el General Andrés Ortiz de Ocampo, se había casado en 1722 con Mariana Bazán de Pedraza, heredera del Mayorazgo de Tótox, hija del Maestre de Campo Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda Guzmán, un riojano que había sido Gobernador del Paraguay, cuya mujer en segundas nupcias fue Francisca de Lezama.<sup>3365</sup> Esta mujer, al enviudar en 1764, designó como albacea de su marido Bazán al bastardo Ocampo Ysfrán, el hijo adulterino de su yerno el General Ortiz de Ocampo.

Esta designación provocó la indignación de Cipriano Camaño Ribadeo y Figueroa, marido de Marciana Bazán de Cabrera, hermana del finado Juan Gregorio,<sup>3366</sup> que finalmente lo impugnó "...por notoriamente infame, por espurio, desterrado, tumultuario, y revoltoso".<sup>3367</sup> Veinte años después, en 1782, el mayor de sus medios-hermanos legítimos, Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, padre del prócer Francisco Antonio Ortiz de Ocampo,<sup>3368</sup> del literato, Provisor y Vicario General del Obispado de Córdoba R.P. José Nicolás Ocampo Villafañe,<sup>3369</sup> y del poeta neoclásico José Gabriel Ortiz de Ocampo,<sup>3370</sup> le otorgó un poder para testar. Contrariando sus propios principios igualitarios, pero fiel a los dictados de su poderdante, el albacea y noble bastardo Ocampo Ysfrán otorgó en 1783, un año después de fallecido su medio hermano Andrés Nicolás, el anunciado testamento, previniendo a los herederos del Mayorazgo de Tótox que "...siempre que por casamiento desigual degeneraren, ...pierdan el vínculo como transgresores de aquella primera intención y pase el goce al que de la misma línea llevase el lustre de la familia".<sup>3371</sup> La desigualdad matrimonial (étnica o estamental) era combatida en esos tiempos por la promulgación de la Pragmática Real sobre Matrimonios.<sup>3372</sup>

Finalmente, parecería que el estigma de su mestizaje y de la forma ilegítima en que Ocampo Ysfrán fue concebido lo persiguió de por vida, pues en 1786 --veinte años después de haber litigado en los estrados de Córdoba con Camaño y Figueroa, tío político de su padre, y contando ya con 62 años de edad-- al ser electo Alcalde Ordinario de La Rioja, el Subdelegado de Real Hacienda Capitán Juan Antonio Gómez lo impugnó en virtud de su origen bastardo. Como Ocampo estaba vacunado contra estas adversidades no se encrespó ni retó a duelo al insolente peninsular, pero consecuente con su espíritu libertario compuso las famosas décimas, denominadas *Décimas Correctivas*, primero publicadas por Grenón (1922), y veinte años después reproducidas por Carrizo (1942), que llegaron hasta los propios despachos del Gobernador-Intendente de Córdoba.<sup>3373</sup> Con la ironía que lo caracterizaba, y sin acudir al odio o al resentimiento, Ysfrán apeló en dichas décimas a sus pares, los miembros del Cabildo, invitando a su impugnador Gómez, el destinatario directo de sus versos, a practicar una vida esforzada y meritoria, para lo cual aludió a los méritos individuales:

!Mira que es terso el candor  
de la nobleza adquirida!

y continuar introduciendo, entre otros tópicos, los de la bastardía y la hidalguía combinadas con metáforas que aluden a las alturas andinas y con ironías acerca de la contradicción manifestada entre su conducta y su nacimiento:

- |    |  |
|----|--|
| I  | 1. De la ilegitimidad<br>2. del sujeto que aborreces<br>3. as hecho mención mil veces<br>4. con sobrada libertad;<br>5. mas tu mala voluntad<br>6. no ha de probar, hasta el día<br>7. que cometa bastardía<br>8. por interés o rencor;<br>9. para vos es el rubor<br>10. que presumes de hidalguía.   |
| II | 1. Si es que sois tan bien nacido<br>2. ¿por qué sois tan mal criado?<br>3. Cuando estabas atrasado,<br>4. no eras tan atrevido.<br>5. Nunca has de echar en olvido<br>6. vaibenes de la fortuna;<br>7. porque si tenéis la cuna<br>8. en las más altas montañas,<br>9. siempre que useis de marañas<br>10. tu honra será ninguna. <sup>3374</sup> |

Ocampo Ysfrán, aparentemente, sentó jurisprudencia. Su lucha no fue en vano, pues ante casos semejantes de discriminación en perjuicio de hijos naturales o ilegítimos su opinión habría sido consultada, al extremo de ayudar en la defensa de quienes se encontraban en situaciones de marginamiento.<sup>3375</sup>

## C-VIII Denuncias poéticas contra la crueldad del poder.

Por último, en las provincias litoraleñas, a semejanza del Paraguay de Antequera (1735), la fronda patricia tampoco cesaba, y se encarnizaba por la incidencia de la participación matriarcal. En Corrientes, la rebeldía local contra el poder real se manifestó en 1764, en las acciones colectivas más crudas de que se tuviere memoria, por incluir participación femenina, oportunidad de la denominada Rebelión Comunera.<sup>3376</sup> Según el testimonio de José Borjes, corría la versión en la ciudad de Corrientes,

"...que unos bersos que cantaban los comuneros, haciendo relación de su istoria, aplaudiendo su Gobierno y motejando el del Tte. [Manuel] Rivera, a quien en la puerta del cuarto donde estaba Preso se los cantaban los soldados que estaban de Guardia les había compuesto Fr. Roque Delgado religioso de San Francisco quien compuso sobre el particular poesías de distintos modos, victoreando a los que en la noche de la prisión del Tte. Rivera se habían señalado, y en expecial a Paredes que havia entrado por delante, en los que tocaban por escarnio y burla, a los que no habían tenido por parte en el común [apelados agarrotados], y al crédito de algunas familias y mugeres que volvían por el Tte., y que dho religioso hera mucho de la parte de los Comuneros y del cura [Antonio] Martínez y lo más del día asistía con estos, y que estos también frecuentaban mucho al Convento de San Francisco y a la selda del Pe. Lector Agüero íntimo amigo de dho Cura Martínez".<sup>3377</sup>

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en Corrientes no lograron desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía inquisitorial y pro-jesuitica. Después de dicha Rebelión, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fue copado por los ajesuitados encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego Familiar del Santo Oficio de la Inquisición Ziprián de Lagraña.<sup>3378</sup> Veinte años después, en 1795, Antonio Hidalgo,<sup>3379</sup> fue separado de la Alcaldía de primer voto, presumiblemente "...por el veneno que lo llenaba contra los vecinos Europeos de la jurisdicción de Corrientes, calidad que hace más detestable sus excesos".<sup>3380</sup> Esta separación benefició a su sobrino político Phelipe Díaz Colodrero, un yerno de Juan Estéban Martínez.<sup>3381</sup> Otros diez años después, no obstante el incremento demográfico provocado por la inmigración de peninsulares, la proporción de la población española (blanca) sobre el total no había variado substancialmente, aumentando sí la de los mestizos y mulatos. Por ello es que en su Cabildo, a pesar de su dilatado vecindario --su composición demográfica alcanzaba a más de 2.000 padres de familia-- sólo se atendía "...al pribado interés de aliados y parientes, ...sucediéndose unos a otros".<sup>3382</sup> Por ejemplo, en las elecciones capitulares de 1805, éstas habían recaído en Don León Saucedo y Pedro José Cabral Báez, quienes, según el Informe del Comisionado General al Virrey Sobremonte, fueron reprobadas por la Gobernación-Intendencia debido a los vicios mencionados.

Un año después, en 1806, se produjeron incidentes y el Alcalde Juan Estéban Martínez,<sup>3383</sup> se vio precisado a elevar al Virrey Sobremonte una representación o petición colectiva donde denunciaba los vicios padecidos por las elecciones celebradas en ese año. Según Martínez los dos juzgados ordinarios estaban gobernados por la asociación de Manuel de Bedoya y Cossio,<sup>3384</sup> y el Alférez Real Serapio Benítez de Arriola,<sup>3385</sup> "...quienes precisamente eligen para los empleos concejiles a sujetos que los ha de gobernar".<sup>3386</sup> Los parciales de Bedoya eligieron para Alcalde de primer voto a Don Manuel Gómez Cossio, "pariente inmediato del citado Vedoya", y para alcalde de segundo voto a Eugenio Tomás Cabral.<sup>3387</sup> Al parecer el Alférez Real Benítez de Arriola contaba

con influyentes sobrinos carnales, entre los cuales se destacaron José Ignacio Benítez, Juan González (por hallarse casado con una hija de Josefa Benítez, hermana de Don Serapio), y Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de Eugenio Cabral.<sup>3388</sup> Martínez en cambio había elegido infructuosamente para Alcalde de Primer voto al Comandante de Armas Pedro Fondevila,<sup>3389</sup> para Alcalde de Segundo Voto a Bartolomé Varela y Montoto, "criollo del Reyno de Galicia", y para regidores a José Ramírez y José Antonio Peñalver, ambos españoles y "sujetos de lustre y conveniencia", entendiéndose por conveniencia, status económico.<sup>3390</sup>

Sin embargo, dos años más tarde, en 1808, Martínez logra su propósito, y Fondevila es confirmado Alcalde de Corrientes "...con el sólo voto del Alguacil Mayor y contra los de todos los demás capitulares".<sup>3391</sup> Esto origina una protesta de los Alcaldes y Regidores del Cabildo de Corrientes, representados en 1809 por el porteño Mariano Moreno.<sup>3392</sup> Amén de las Alcaldías, la Administración de Correos también estaba expuesta a serios conflictos provocados por las diferencias existentes entre linajes locales. Cuando fue designado Virrey Santiago de Liniers recayó el nombramiento de Administrador de Correos en Estéban María de Perichon, yerno del Alguacil Mayor Martínez; y apenas fue designado Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, recayó la designación de Administrador en Vicente de Goytía. Producida esta última, se desató en Corrientes una acción colectiva, similar a la registrada en Tucumán con motivo de la erección del Estanco de Tabaco, "...y entre los de música y vítores se comprendieron el comerciante Don Fermín Félix Pampín, yerno de Goytía y un hijo de este llamado Don José Joaquín, oficial del Correo".<sup>3393</sup> La expresada música fue considerada "...en clase de pifia de la casa y familia de dicho Alguacil Mayor [Martínez], y [del Teniente Gobernador] Don Pedro Fondevila, notorio parcial de dicho Alguacil".<sup>3394</sup>

Un caso de identificación simpatética y catártica con el héroe criollo o mestizo fue uno acontecido en el Paraguay. No obstante el hallazgo de varios ejemplares de poesías extremadamente sugestivas, es posible que por la naturaleza bilingüe de la población paraguaya, incluida parte de su propia elite, muchos de los poemas hayan circulado en lengua Guaraní.<sup>3395</sup> Estas producciones poéticas --que contaban con fuerte raigambre popular-- cuestionaban la corrupción reinante entre los altos funcionarios públicos, a propósito del secuestro, arrendamiento y venta de las propiedades Jesuíticas (Temporalidades).

Entre los gobernadores designados para imponer en Paraguay el Ramo de las Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires Agustín Fernando de Pinedo,<sup>3396</sup> manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría encomenderos.<sup>3397</sup> Su impopularidad obedecía a los reiterados abusos que llegó a practicar, los que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.<sup>3398</sup> Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien había denunciado en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.<sup>3399</sup> A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos logrado rescatar del olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de Concepción Ayudante de Milicias Manuel García Barrazábal-- otras siete de esas "décimas" y algunos estribillos, las cuales como las anteriores no pueden ser consideradas Espinela por no guardar las leyes métricas correspondientes. Si bien dichas

"décimas" fueron leídas en la plaza y parajes públicos de Asunción por un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las mismas. Según García de Barazábal, el método de interrogar al reo consistía en leerle cada décima y cada estribillo y preguntarle por su inteligencia y por la de cada término en determinada forma significativa.<sup>3400</sup> Para ello no "...asido dable separar muchos ternos de las décimas y estribillos porque entonces no significan mal y solo tienen perversa inteligencia reídos del verbo que los determina".<sup>3401</sup> El texto de Vallejos comienza con una "décima" elegíaca dedicada a sus compatriotas Paraguayos por los sufrimientos recibidos de manos del Gobernador Pinedo, a quien se lo estigmatiza con el calificativo de faraón,<sup>3402</sup> las que rezan:

- I
1. Con lamentación profunda
  2. Lloro a mis hijos pobres
  3. Ya no hay repiques, si dobles
  4. por mis muertos fundamentos
  5. que alguna vez opulentos
  6. fueron cuando fuí Ciudad
  7. Y con tanta brevedad
  8. se cayeron mis cimientos
  9. quien así te a puesto Provincia Leal
  10. el Faraón Pinedo con su crueldad

- II
1. Desde el año que entró en mí
  2. con achaque de Gobernador
  3. diferencia del Infierno
  4. no tengo puedo decir
  5. por que todo es maldecir
  6. todos al Gobernador
  7. Su nombre les causa horror
  8. ha buuelto pobres a ricos
  9. a pobres Locos, Borricos
  10. es loba sin ton ni son

1. Malaya sea la hora
2. ay de mí, ay de mí
3. que ese Neronitano
4. se llegase aquí

En la tercer y cuarta "décimas" Vallejos hace eje en la explotación que significaba al vecindario de Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por Pinedo tanto al fundar la Villa de Concepción, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, en 1776.<sup>3403</sup> De dichas exacciones no estuvo exenta la propia gente de su compañía, lo cual dió lugar a un motín y a la "décima" de protesta que reproducimos:

- III
1. De hambre Peste y Mortandad
  2. y de Infieles abatida
  3. de Langosta perseguida
  4. estoy que no puedo más

5. en nada ya no me arribo
6. En la Causa decir puedo
7. el Gobernador Pinedo
8. que a costa de mis costillas
9. a Poblado nuevas Villas
10. con tan furioso desnudo

IV

1. Y sé que a informado al Rey
2. que a costa suya a Poblado
3. y el Rey engañado de él
4. ya sus rentas le a doblado
5. este es de insaciable sed
6. todo lo quiere abarcar
7. nada quiere perdonar
8. en materia de interés

La quinta "décima" hace alusión a las actividades mercantiles de Pinedo y a su inescrupulosidad, pues incluía el consumo de mercancía contrabandeada:

V

1. Es un fuerte Mercader
2. a los Pueblos a fundido
3. al comercio lo a perdido
4. porque a su interés prefiere
5. y con su poder adquiere
6. sin mirar a lo prohibido
7. Gobernador comerciante
8. Y con familia y mujer
9. que bienen muertos de hambre
10. que cosa buena han de acer

En la sexta "décima" no se salvó siquiera la propia mujer de Pinedo cuyo comportamiento con respecto a los bienes de los Expulsos Jesuitas fue anatematizado:

VI

1. Muchas cosas del Secuestro
2. con trampas, drogas, e industrias
3. estas las sacó y son suias
4. que la prueba daré presto
5. Hagarra a diestra y siniestro
6. y con tal enormidad
7. que asta un cierto Petoral
8. sin Seresa la gozola
9. su mujer Doña Bartola
10. a la Virgen vi quitar

1. Virgen de congregación
2. Madre de Misericordia
3. como permites Señora
4. tan Sacrilega extracción

VII

1. No para siempre permite

2. Dios y si nos sufre és
3. que algún día puede ser
4. que el Rey sobre el caso adbitre
5. que traiciones el no admite
6. mas antes las abomina
7. miren los de la propina
8. injusta cuanto traidora
9. que nos de inhibitoria
10. del en lo que determina

1. Seguro está que lebante
2. en contra de aquesto el dedo
3. el faraón de estos tiempos
4. que es el pérfido Pinedo.<sup>3404</sup>

### C-IX La poesía en clave de contrapunto.

Entre los casos de identificaciones simpatética y catártica con el héroe criollo se destacó un caso acontecido en la Banda Oriental, el de los agravios sufridos por Manuel Cipriano de Melo.<sup>3405</sup> Este último era un marino nacido en Lisboa, pero criado en Montevideo, que acompañó primero al Gobernador José de Andonaégui en las Guerras Guaraníticas (1754), luego al Marqués de Valdelirios en la Expedición de Límites y en su retorno a Cádiz (1754), tiempo después al Gobernador Pedro de Ceballos en el asedio a la Colonia del Sacramento (1776-77), y finalmente fue víctima de la pública persecución que se hacía entonces de los contrabandistas. Cruzando el Río Uruguay, en la Banda Oriental, la implementación del género poético con fines políticos no estuvo ausente.<sup>3406</sup> En la nómina de las fianzas de cárcel libradas en favor de contrabandistas figuraba la persona de Melo, quien a pesar de pertenecer a la elite Oriental --no obstante su origen portugués-- había sido apresado in fraganti en varias oportunidades.<sup>3407</sup> La última de sus prisiones se produjo en 1785, a raíz de sostener un incidente con el Contramaestre del Resguardo Juan Mateo Mourigade, y es certeza que Melo a partir de ese momento se convirtió en represor del contrabando al que antes había sido afecto. Como un contrasentido con sus antecedentes "delictivos" poseía Melo un espíritu sensible, reflejado en el hecho de poseer una interesante biblioteca, entre cuyos libros de poesías se destacaban ocho tomos en cuarto del Parnaso Español,<sup>3408</sup> y ser amigo personal de Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres. Por otra parte, dejó para la literatura rioplatense un rastro imborrable al componer unas décimas en forma de imaginario contrapunto o payada con un amigo,<sup>3409</sup> revelando lo extendido que se hallaba el espíritu de los trovadores y de la tensón. Estimamos que el amigo pudo haber sido su abogado el Licenciado Vega, Manuel Rodríguez de la Vega, probablemente.<sup>3410</sup> Las décimas ofrecen la particularidad de estar separadas en un cuarteto, donde el agraviado toma la palabra, y una sextilla, con la respuesta del amigo. La estructura corresponde a la "espinela". El texto de Melo, reproducido por vez primera en el artículo de uno de los autores de este trabajo,<sup>3411</sup> comienza con una absolución de cargos y un reproche contra el Virrey Loreto:

- |   |   |
|---|---|
| I | 1."Cipriano: No delinquí contra el Rey  |
|   | 2.           tampoco contra el estado,  |
|   | 3.           mis deberes e llenado      |
|   | 4.           luego que quiere el Virrey |

5. Amigo: Obedecer Justa Ley  
6. es que a todos nos obliga  
7. sufre amigo, no se diga  
8. que se amilana el valor;  
9. es muy justo ese Señor,  
10. esperanza, y que prosiga

- II 1. Cipriano: Del Rey en ningún destino  
2. caudal tengo ni poseo  
3. luego porque aquí me veo  
4. imitando a un capuchino?

5. Amigo: Que otra es la causa imagino,  
6. y así ten cuenta Cipriano,  
7. vé con detenida mano  
8. no enoges a la Exelencia,  
9. implorale su clemencia,  
10. y ten fé que no es tirano.

- III 1. Cipriano: En tiempos atrás confieso  
2. que no sé si e reservado  
3. pero si estoy perdonado  
4. a que biene este proceso?

5. Amigo: Chitón Amigo que el peso  
6. del Gobierno mucho abrasa  
7. y quien sabe si la trasa  
8. de alguna chispa te toca  
9. y así, Melo punto en boca  
10. y vamos a pasa pasa

En la cuarta décima Melo hace relación de sus méritos y servicios para finalmente preguntarse por la identidad de quien tan injustamente lo ha denunciado:

- IV 1. Cipriano: Si cumplí mi obligación  
2. si no fui defraudador  
3. si e sido buen servidor  
4. quien me causa esta prisión

5. Amigo: Hermano en Christo estoy, son  
6. justos destinos del cielo  
7. que no penetra el desvelo  
8. ni la cautela rastrea  
9. mas por si es que ...sea  
10. no te sorprenda el recelo

En la quinta y última décima manifiesta Melo su preocupación por los malignos efectos de la claustrofobia:

- V 1. Cipriano: Pero dime por ventura

2. puede darse sufrimiento
3. que en tanto padecimiento
4. no haga extremos la locura?
  
5. Amigo: ya lo sé mas la cordura
6. es el freno en caso tal,
7. pues ya ves que sin igual
8. y absoluto en el poder
9. y callando puede ser
10. que sea menos el mal

- VI
1. Cipriano: Dime en esta estrechez
  2. enterrado en vida amigo
  3. que me dirás que consigo".<sup>3412</sup>

Asimismo, en Buenos Aires, corría la intriga y la cizaña. En casa de Francisco Antonio de Escalada, le fue echado un pasquín anónimo en dos oportunidades en que celebraban su acostumbrada tertulia, por la ventana que de la sala "...cae a la calle".<sup>3413</sup>

También, en la campaña de Buenos Aires, más precisamente en Luján, al encontrar los hacendados en su Cabildo un seguro refugio, se reproducen situaciones conflictivas provocadas por el nepotismo.<sup>3414</sup> Confirmando esta situación, Nicoletti (1987) descubrió que en el Cabildo de Buenos Aires Manuel Antonio Warnes,<sup>3415</sup> había cuestionado el voto del Regidor Gregorio Ramos Mexía,<sup>3416</sup> en favor de Miguel de Azcuénaga,<sup>3417</sup> por el parentesco en cuarto grado, así como observado con acierto que en el Cabildo de Buenos Aires se habían nombrado en diferentes años al padre, abuelo, y tíos de Azcuénaga, sin que nadie hubiere puesto obstáculo alguno a dichos nombramientos.<sup>3418</sup> Finalmente, en vísperas de la Revolución de Independencia, Felipe Contucci, el vocero de la Princesa Carlota, nos revela en los destinatarios de la propaganda Carlotista el rol que tuvieron en la elite criolla las solidaridades familiares.<sup>3419</sup>

Por último, entre los motivos que dieron lugar a la gestación de una vena lírica de corte popular también figuraban los agravios sufridos por los pacientes de médicos peninsulares inescrupulosos. Cuando el que fuera Alcalde Ordinario de la ciudad de Corrientes Juan Antonio de Lafuente,<sup>3420</sup> experimentó una frustrada curación de parte de un tal Licenciado Gutiérrez --probablemente Antonio Gutiérrez del Castillo--<sup>3421</sup> aquél tuvo la buena idea de vengarse del fiasco sufrido dirigiendo 148 hirientes versos, en veintiseis desiguales estrofas, contra el consabido médico y la corporación que representaba.<sup>3422</sup> En dichos versos abundan reflexiones y prejuicios acerca de: a) los altos aranceles cobrados; b) la escasa pericia médica demostrada por el galeno; c) sus orígenes nacionales (andaluz) y plebeyos (presunto pasado como tabernero o barbero); y d) los costosos remedios recetados.<sup>3423</sup>

Como consideración final, podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII aquí relatadas, que la causa eficiente de las mismas fue por lo general el cerrado comunismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas y la denominada Revolución de Independencia, pues lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron

acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente.

En cuanto a las opciones intelectuales (tipo de público y naturaleza de los discursos ideológicos elegidos), que los autores aquí estudiados adoptaron en su producción poética se debe establecer que si bien transmitieron discursos de honda identificación catártica por la situación colonial entonces padecida, eligieron como audiencia a un público culto, toda vez que no innovaron en el lenguaje ni pretendieron ser portavoces del habla popular campesina (gauchesca o en lengua vernácula, quechua o guaraní). En otras palabras, los versos de protesta reveladores de injusticias y atropellos, puede decirse que son como el anticipo, embrión o huella indiciaria del espíritu con que la élite intelectual y política de las provincias interiores encararía más tarde la gesta de emancipación. En cuanto a las opciones artísticas (personajes, asuntos, lengua, formas literarias, etc.), tradicionalmente regidas por las opciones intelectuales, aunque no necesariamente dependientes de las mismas, en ninguno de los poemas aquí estudiados se revela un intento de independencia lingüística, como más tarde se ensayaría, bajo el influjo del romanticismo. Respecto a la métrica adoptada, todos los versos hallados están concebidos en el octosílabo, lo cual nos revela que al igual que en la península este metro era de uso corriente en el ámbito americano, ya en redondillas y cuartetas, ya en estrofas de once y doce versos así como en poemas extensos narrativos, irónicos, de protesta o de sátira o parodia. La utilización invariable del octosílabo, verso español por excelencia y adecuado al propósito de los autores, evoca de inmediato en todos los casos la idea de trasvasamiento o de recepción estética. Por otra parte, en Camboño, Ocampo, Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente, con sus largas tiradas, se advierten las infinitas posibilidades del octosílabo en la expresión, como queda dicho, de agravios, sátiras, protestas e invectivas, a la que todos ellos cedieron sin reservas de ninguna naturaleza.

Desconocemos la existencia de otras producciones poéticas que pudiesen revelar anterioridad o continuidad en la frecuentación de las musas de parte de los mencionados vates que, por el momento, se nos presenta como una fractura literaria que responde a motivos políticos de trascendencia histórica. De cualquier modo, luego de dos siglos, han surgido del anonimato en que yacen seguramente otros numerosos autores de la época colonial.

\* Este capítulo fue producto de la co-autoría entre el extinto José González Ledo y este autor.

## Capítulo II-A-4      **Brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios.**

### Índice

- CH-I Tradición historiográfica en materia de descomposición simbólica
- CH-II Rituales de honor o representación capitular y la delegación del carisma real.
- CH-III Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos.
- CH-IV Lugar y días en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas).
- CH-V Conflictos entre el clero secular y el clero regular.

CH-VI Ausencia de autoridades seculares de las funciones religiosas.  
CH-VII Etiqueta que debía regir los actos universitarios.

## **Introducción del capítulo II-A-4**

En nuestro trabajo, nos hemos comprometido a analizar el arsenal simbólico que vino a sustituir a la constelación de símbolos vernáculos o indígenas pre-colombinos. Para ello hemos de analizar la redistribución ceremonial originada en la apertura del tráfico del Atlántico sur, a raíz de la caída de Portobello (1740) y la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748); en la erección del Virreinato del Río de la Plata (1778), provocada por la Paz de París y el consiguiente traslado de la sede central de los dominios portugueses en América de Bahía a Río de Janeiro (1763); y la diagramación de nuevos espacios administrativos con la Real Ordenanza de Intendentes (1784), originada a partir de la Paz de Versailles (1783). En otras palabras, nos proponemos analizar dichas constelaciones de poderes, rangos y privilegios en el espacio ampliado de todo el Virreinato. Por ejemplo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las Villas de Potosí y Tarija. Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Charcas fue afectado en su rango y poder el Cabildo de la Villa de Oruro. Por estar sujetos a la Gobernación-Intendencia de Salta fueron afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Por estar sometidos a la Gobernación-Intendencia de Córdoba fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto. Y por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de Corrientes, Santa Fé y Luján.<sup>3424</sup>

Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la denominada revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas centralizadoras de Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Comandantes de Armas y Oidores se intensificara inconscientemente la resistencia de los patriciados locales.<sup>3425</sup> Dichas políticas centralizadoras recaían en la facultad de los Subdelegados de Real Hacienda y de los Gobernadores de:

- a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta,
- b) confirmar elecciones concejiles,
- c) designar autoridades políticas subordinadas,
- d) otorgar fuero militar,
- e) conferir rango de capital de provincia así como el de Villa Real,
- f) recaudar impuestos y practicar levas,
- g) administrar bienes de Temporalidades,
- y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol cumplido por el ejercicio de producir actos de honor o representación civiles y religiosos (privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial público). Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en actas capitulares y litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), en el Archivo Histórico de Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

## **CH-I Tradición historiográfica en materia de descomposición simbólica**

En un principio, para los antropólogos mito-ritualistas como Edmund Leach los rituales debían ser analizados con independencia de los mitos.<sup>3426</sup> Pero después de haber recibido el influjo del estructuralismo y de la gramática transformacional, Leach llegó a la conclusión que debían concebir al ritual como un lenguaje para lo cual se debían dilucidar sus reglas gramaticales y su sintaxis, tal como si se tratara de una lengua desconocida.<sup>3427</sup> Entre los rituales a interpretar se dan las convenciones y prácticas sociales tales como el protocolo, la cortesía y la efeméride, los que fueron analizados en un principio por Dworkin (1988).<sup>3428</sup> Más luego, Leal Curiel (1990), Foucault (1992) y Díaz Cruz (1998) sostuvieron también que los rituales en ocasión de efemérides (bautismos, consagraciones, funerales y aniversarios) operaron del mismo modo que las narraciones legendarias y las crónicas históricas, como símbolos y conductas convencionales no verbales, ilustrativos o teatralizadores de mitos así como intensificadores del poder y consecuentemente dinamizadores de los desequilibrios en la balanza de poder.<sup>3429</sup>

El primero que se le ocurrió analizar el rol desempeñado por el ceremonial en la historia Argentina fue el historiador santiagueño Di Lullo (1960). Más recientemente, Urquiza (1991), fundado en Elias (1982), sostuvo la necesidad de tomar en cuenta, para el análisis de la conflictividad estamental --en su caso los conflictos de etiqueta-- los desequilibrios de la balanza de poder que se dieron entre las corporaciones de dicha modernidad colonial-absolutista. En realidad, Urquiza se propuso analizar en los estrechos límites del Buenos Aires colonial las distintas constelaciones de rangos y privilegios que los diferentes desequilibrios de dicha balanza de poder provocaron. En la cronología de dichos desequilibrios, Urquiza le asignó importancia crucial a la Expulsión de los Jesuitas (1767) y a la fundación del Virreinato del Río de la Plata (1777). Últimamente, Guerra (1989,1990) y Leal Curiel (1990) sostuvieron la necesidad de analizar en las sociedades del orden imperial-absolutista no las estructuras sino la conducta de los actores sociales y políticos, y en el origen del federalismo el comportamiento de las capitales y municipios de provincia.<sup>3430</sup> Finalmente, Salvatore (2003) y Plotkin (1994) analizaron los roles simbólicos desplegados durante el Rosismo y el Peronismo en la construcción de efemérides y rituales propios.<sup>3431</sup>

## **CH-II Los rituales de honor o representación capitular y la delegación del carisma real.**

Los actos y rituales de honor, etiqueta o representación capitular, debidos al estado superior o monarquía reinante, como el de pasear el guión, pendón o estandarte real (bautismos, cumpleaños, santos, bodas o funerales reales), una suerte de talismán pagano, fueron fuente de frecuentes disputas y variaban con la importancia de la ciudad o villa donde se celebraba la ceremonia.<sup>3432</sup> Pasear el guión no era "...privativo de los Señores Alcaldes y sí trascendental a todos los asistentes de distinción, que se les convida para cargarlo de en trecho en trecho, según las clases y distinción".<sup>3433</sup>

Los actos de honor debían adjudicarse al lugar o espacio "...que es el que forma el orden, y distingue el rango y dignidad de cada uno".<sup>3434</sup> Cuando a un acto solemne asistía el virrey, él era el primero que debía cargar el guión, pues la institución aragonesa del virrey venía a sustentar la ficción de la simultánea presencia del rey en la metrópoli y en la

colonia.<sup>3435</sup> En esa ficción, el virrey era delegado del rey, y por ello estaba automáticamente revestido de un poder carismático, por más fetichizado o rutinizado que estuviere.<sup>3436</sup> Le seguían luego en el orden de precedencia de la representación los gobernadores, los alcaldes, los oficiales reales, los regidores, y luego los demás asistentes. Así es que, aún cuando faltase uno de los Alcaldes no era necesario que entrare un Regidor a suplirle, pues este acto "...no era prerrogativa privativa de ellos, pues era trascendental a todo asistente de distinción".<sup>3437</sup> Por el contrario, el portar los cordones o borla del Real Estandarte, que por costumbre inmemorial era privativo sólo de los Alcaldes, no lo era de los Gobernadores ni de sus Tenientes Letrados, aunque asistieran al Cabildo, ni de los Oficiales Reales ni de los Regidores. Con que faltando uno de los Alcaldes, a quienes única y privativamente correspondía portar la borla, era preciso que sólo entrara en el ruedo "...el que tiene derecho a suplirles y sucederles".<sup>3438</sup> En Tucumán, en 1795, el Alguacil Mayor Joaquín Monzón,<sup>3439</sup> enfrentado al Fiel Ejecutor Diego Ignacio Aráoz,<sup>3440</sup> solicitó que se aprobara el auto del Gobernador de Salta García de León y Pizarro por el que se declaraba que a Monzón le correspondía como Alguacil Mayor el voto y asiento después de las Justicias pero con precedencia a los demás Regidores.<sup>3441</sup> En Córdoba, en el Viernes Santo de 1754, el Cabildo le ordenó al Comandante de Armas Félix de Cabrera,<sup>3442</sup> sacase en procesión una insignia, demanda a la cual Cabrera se excusó "...haciéndoles presente que la obligación de sacar insignias tocaba y era de los vecinos feudatarios desde la fundación y erección de esta dicha ciudad y no mía".<sup>3443</sup> Como consecuencia de su desobedecimiento los Alcaldes Ordinarios José de Molina Navarrete,<sup>3444</sup> el mismo que había sido detenido por Cabrera diez años antes, en 1744, y Juan Antonio de la Bárcena,<sup>3445</sup> "...arrojaron a empellones de la sala capitular al Comandante Cabrera, quitándole de las manos el bastón y arrestando su persona".<sup>3446</sup> Este arresto Cabrera lo atribuyó primero a:

"...la soberanía que dichos Alcaldes han conservado en esta dha Ciudad por falta de otro Juez Político que les reporte en tanta distancia como ai para buscar recurso hasta la Real Audiencia del distrito [Charcas]".<sup>3447</sup>

En segundo lugar, Cabrera atribuyó su arresto a:

"...la antipatía, que tienen a los militares por la mucha ambición de dominar todos los Premios, como es evidente lo han practicado, y constan de los autos contra dicho Teniente de Rey y contra mí; y aún contra el Gobernador negándole el comparendo de las precisas diligencias que se hallan en la última providencia de SSa.".<sup>3448</sup>

A su vez, en contra-represalia por la prisión de Cabrera, y muy probablemente en virtud del abuso con que los Mayordomos de Propios y los Tenientes de Oficiales Reales recaudaban para sí los derechos de entrada de carretas y arrias de mulas procedentes de Buenos Aires, el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>3449</sup> suspendió en mayo de 1754 los oficios y varas concejiles que Gerónimo Luis de Echenique y su familia monopolizaban.<sup>3450</sup> Medio siglo más tarde, en 1804, el mismo Cabildo de Córdoba seguía sosteniendo que el acto de presidir una función del cabildo era un acto de honor y no de jurisdicción. Sin embargo, para el Gobernador de Córdoba Cnel. José González,<sup>3451</sup> en pleito con su Cabildo, el acto de presidir una sesión era, utilizando una metáfora organicista propia de la época,<sup>3452</sup> "...el acto de informar un Cuerpo, de distinguirlo de otros, y dirigirlo en todas sus funciones".<sup>3453</sup> De ahí que, según González, "...para hacer un Cuerpo sólo, basta que hayan algunos Regidores; pero para formar Cabildo se necesita un

Presidente que lo informe, que lo distinga de otro, y lo dirija en todas sus operaciones".<sup>3454</sup> Así como en el orden natural, "...un cuerpo sin cabeza sería un Monstruo", en el orden judicial "...una cabeza sin jurisdicción sería una quimera".<sup>3455</sup> Esta era la única razón por la que los Oficiales Reales (Tesoreros y Contadores) "...no pueden jamás ser admitidos a presidir en el Cabildo, pues como acto riguroso de jurisdicción, exige la inestidura capitular, y la autoridad privativa de los individuos de ese cuerpo".<sup>3456</sup> La representación del Tesorero y del Contador (Oficiales Reales) en actos capitulares era "...sólo de huéspedes, pero los huéspedes no suplen la falta de los dueños de casa".<sup>3457</sup> Conceder el Cabildo a un huésped el primer lugar, "...velar sobre la inviolabilidad de su persona y sus derechos, disimular cualquier exceso de ellos y cederle los oficios honrosos de su casa", no era un acto de jurisdicción, que pudiera significarle a sus miembros "rebaja o demérito de su clase u orden", y sí

"...la conducta general de un dueño generoso; al contrario, sensurar indistintamente sus procedimientos, anticiparse a precaber cualquier gracia, y disputarle groseramente en su casa el asiento de honor y preferencia, será de consiguiente una conducta incivil y extravagante".<sup>3458</sup>

También el ceremonial civil estaba íntimamente ligado con la indumentaria. En 1758 el Cabildo de Buenos Aires resolvió no usar más el traje de golilla,<sup>3459</sup> y usar en cambio el traje negro.<sup>3460</sup> Pero en 1764 se acordó, como excepción, que aquellos Cabildantes que fueren en comisión a ver al Gobernador lleven en la ocasión traje de golilla.<sup>3461</sup>

### CH-III Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos.

En cuanto a los actos religiosos, una profusa jurisprudencia tuvo lugar en los conflictos sobre etiqueta y ceremonial que se dieron entre Párrocos por un lado y Cabildos y Subdelegados por otro, y entre Obispos y Gobernadores. Los conflictos eran ocasionados por el lugar, los protagonistas, los objetos y los días o jornadas en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas o festividades). Para Abercrombie (1992), la participación actual de las elites en las festividades religiosas, como el Carnaval de Oruro, constituiría una suerte de paradoja post-colonial. Sin embargo, en mis investigaciones dieciochescas he podido comprobar como en las procesiones de Corpus Christi se solía discutir entre Curas y Subdelegados la identidad de los **altareros**.<sup>3462</sup> También se llegó a discutir si el Santísimo debía ser parado en doseles o en algo más costoso como los altares. En un caso paradigmático ocurrido en 1801 en San Pedro de Tarata, Departamento de Cochabamba, el Subdelegado Manuel Pardo de Figueroa, sustituto del Subdelegado Vicente Ramón de Espinosa y Arrasola, se opuso a que se hicieran altares en lugar de doseles, y a nombrar **altareros** para la procesión de Corpus Christi.<sup>3463</sup> Los **altareros** eran, por lo general, designados por los Corregidores, y luego por los Subdelegados, entre los hacendados del lugar.<sup>3464</sup> Cuando ello no ocurría, como fue el caso de marras, serios conflictos se avecinaban. Según Rivera (1984), la pérdida del control del espacio urbano, en especial durante las festividades, era una preocupación clave de las elites tanto en tiempos postcoloniales como en tiempos coloniales.<sup>3465</sup> A José Manuel Méndez,<sup>3466</sup> hacendado de Mamata y usual **altarero**, le fue preguntado por el nuevo Subdelegado de San Pedro de Tarata, Juan Ignacio Pérez, si en la solemnidad del Corpus Christi, "...se habían puesto en otros años solamente doceles para parar en ellos al Santísimo en la procesión de su fiesta?".<sup>3467</sup> A lo que Méndez respondió que por orden de la Real Audiencia y del Subdelegado Arrasola "...ser cierto que pucieron solo doceles, y que después de algunos años por orden del mismo Don Vicente se hacían ya altares".<sup>3468</sup> A propósito de la

negativa a hacer altares, se le preguntó a Méndez, "...si era cierto habían puesto en la Plaza una figura con capa colorada, que representaba a Don Vicente Arrasola, y la quemaron a tiempo de la procesión del Santísimo?".<sup>3469</sup> A lo que Méndez respondió que "...vio después de haberse quemado la Cabeza que era figura del Demonio, y que no sabía que hubiesen representado en ella a [Subdelegado] Don Vicente Arrasola ni había oído tal cosa".<sup>3470</sup>

En las procesiones de Corpus, la tradición incluía, que en la llamada **octava**, luego de haber recorrido y desatado los altares, los concurrentes condujeran a casa del **altarero**, en hombros y bailando, algún objeto perteneciente al altar.<sup>3471</sup> Don Joaquín Caravallo declaró que en la Procesión de marras sacó

"...uatro bailes de invención, que dos de ellos parecían estar sentados en cima de una mesa, tocando el violín, y vailando al sonido de él. Que otro parecía que vailaba cabisbajo con los pies en figura de manos, y las manos levantadas con figura de pies. Que el ultimo fué un Castillo con figura del Diablo, que con una capa colorada que encubría los fuegos de que estaba compuesto".<sup>3472</sup>

A renglón seguido a Caravallo le fue preguntado que cosa contenía esa capa colorada y el letrado que llevaba en el cuello? a que respondió que

"...figuraba el demonio ardiendo en llamas de fuego, y que las palabras que tenía en el cuello --de esta capa nadie se escapa-- contenían el que de las hastucias y falacias del Demonio nadie se escapaba, porque hasta el mesmo Hijo de Dios fué por él tentado, y añade que a lo mesmo se redujo la décima que se le puso a la peana de dicha figura, la que a instancias del Declarante la hiso el Padre Fray Hilario Coche, religioso del Colegio de Propaganda Fide de este Pueblo, y haora la manifestó estampada de puño y letra de dicho Padre".<sup>3473</sup>

La décima referida rezaba:

"...Yo soy caudillo orgulloso  
de las tinieblas eternas,  
y vengo de mis cabernas  
siempre de gloria ambicioso.  
Vine pues muy cauteloso  
a tentar hombres de intento;  
mas con gran divertimento,  
sin cuidado me paseo,  
pues con grande gusto veo  
que ellos se tientan sin tiento".<sup>3474</sup>

También aclaró que el año pasado "...sacó una Figura encuetada la que rebentó amarrada en el Rollo como la del próximo año pasado por que no se caiese".<sup>3475</sup> Al preguntársele si era cierto que el Cura del Pueblo induxo a los Eclesiásticos a la facción de los Altares? respondió que "...el Licenciado Don Julián Siles le mandó hacer quatro tarxas o banderas con décimas del trisagio de lo que le pagó al declarante quatro pesos".<sup>3476</sup>

#### **CH-IV Lugar y días en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas).**

Pero el lugar y los días en que debían oficiarse las misas ocasionaba los conflictos más serios. En el caso de la Capellanía fundada en Buenos Aires por Juan Agustín Cueli, su hijo Pedro Valentín Cueli exigió en 1799 que el capellán Eugenio Cueli y Garfías, su primo hermano carnal, dijese las misas en los días festivos en el Oratorio establecido en su quinta, conocida como la Pólvara de Cueli,<sup>3477</sup> mientras que el beneficiado requería que fuese en su propia casa y en días no festivos.<sup>3478</sup> En la cláusula quinta del testamento se ordenaba que las misas se dijeren en el Oratorio que hubiere en la Quinta. Pero aunque después de estar fundada la capellanía se dispensó o rebajó la pensión a sólo veinte misas no se entendió esta rebaja a que no se dijese en Oratorio. El Oratorio en que debían celebrarse las Misas debían entenderse, más bien del público. En los oratorios privados

"...solo se puede decir una misa, y debe de estar presente el Dueño, a quien se le está concedida la gracia y lo que es mas porque todo oratorio privado dura en tanto vive el Dueño, a quien se le está concedida la gracia; y muerto este se expira y se acaba, y no puede pasar esta concesión a los herederos porque es un privilegio personal, que se acaba con la muerte de la persona privilegiada".<sup>3479</sup>

De modo que muerto el privilegiado, ni aún su familia puede usar en adelante de la gracia,

"...porque no se concede personalmente a su familia, sino como accesorio en cuanto les trae para ser partícipes en el privilegio del Señor, y por esto cesando el privilegio en cuanto al dueño, cesa también en cuanto a su familia".<sup>3480</sup>

Sobre todo porque la disposición inalterable del testador fue que la capellanía

"...sirviese para título de Ordenes, y siendo el Oratorio privado no podría servir para título de Ordenes, porque feneciendo el Oratorio con la muerte del Dueño, debía volver la capellanía al tronco, pues quedaba eternamente sin pensión, ni podría tampoco ordenarse ningún pariente a título de ella".<sup>3481</sup>

De todo lo cual Pedro Valentín Cueli deducía que

"...siendo la mente del testador que esta Capellanía sirviese para título de Ordenes, no queda duda, que su intención fue que el Oratorio fuese público, aunque no lo expresase en la cláusula testamentaria".<sup>3482</sup>

Asentado pues por lo demostrado que las Misas se deben decir en Oratorio, que debe ser público; que la fundación se hizo con arreglo a la cláusula testamentaria: que ésta ordenaba ser el Oratorio en su Quinta: que en él se dijieran las Misas: que no ha habido en su fundación dispensa, ni pudo haberla para que no se dijeren en Oratorio, y que éste está establecido en el mismo terreno de la Quinta, Pedro Valentín Cueli demostraba

"...que en los días festivos debe el Capellán decir las Misas, porque el uso de los Oratorios públicos se concede para los días de precepto en que debían conducirse a las Iglesias: y finalmente porque siendo los Oratorios públicos en beneficio del Público, deben igualmente serlo las Misas, y nunca son más benéficas que cuando se celebran en días festivos".<sup>3483</sup>

Pero aún permitiendo que la obligación del capellán fuese decir las Misas en días de trabajo

"...¿Quién será capaz de persuadirse que debe el Capellán decir la Misa cuando quiera? ni que deje de acordar con el Dueño del Oratorio en que días debe decir las, cuando sabemos que en los Oratorios privados hay ciertos días en que no puede celebrar, y que debe estar presente el Dueño a quien se le concedió la gracia del Oratorio privado".<sup>3484</sup>

Todas estas fueron pruebas suficientes para que Pedro Valentín Cueli sostuviera se venga en reconocimiento que

"...la mente del testador fue de que el Oratorio fuese público, y ni es de presumirse otra cosa, pues no es creíble que el fundador instituyese esta Capellanía con su Dinero, para que el dijese las Misas en Oratorio, o a hora que le acomodase, o que no le fuese de consuelo a su familia".<sup>3485</sup>

Por el contrario, el Dr. José Francisco de Acosta, en nombre del Pbro. Eugenio Cueli, alegaba en 1799 que el objeto que se propuso el fundador fue fundar una capellanía "...para que sus hijos y deudos se ordenasen, y no establecer Misas para solemnizar oratorios y días de precepto como quiere Valentín".<sup>3486</sup> Finalmente, el Provisor y Vicario Episcopal Dr. Francisco Tubau y Sala,<sup>3487</sup> falló "...que el citado Pbro. es libre para decir las Misas de su Capellanía en el Oratorio los días que mejor le acomoden sin el gravámen que no les impuso el fundador".<sup>3488</sup>

En otro sonado caso capellánico ocurrido en La Rioja, el Dr. Mateo de Medina y Sotomayor, aseguraba en 1813 que el instituyente de la capellanía, el Cura de Los Llanos Pbro. Sebastián Cándido Sotomayor,<sup>3489</sup> concurría a la festividad de San Nicolás de Bari sólo en lo material "...con la cera, compostura de la Iglesia, música, trabajo de sus esclavos y familia y demás adherentes materiales sin introducirse a pagar [lo formal de] la función".<sup>3490</sup> Esta actitud de Sotomayor obedecía al interés de que el Cabildo de La Rioja no se desentendiera de "...su antigua precisa obligación jurada".<sup>3491</sup> Sin embargo, el Cura escusador y el Regidor Baltasar Agüero intentaban compeler a Medina a dicho pago amenazándolo con no celebrar la función del Santo sin que procediera este requisito. Si la institución de la Capellanía "abrasase las misas y sermón", Medina aseguraba que se

"...destruiría de plano los fines piadosos de la república que se propuso la utilidad común cuando en sus primeros establecimientos se pusieron con juramento bajo la tutela y protección del Santo Patrón".<sup>3492</sup>

En dicho caso, Medina reiteraba que la función (sermón y procesión) y misas del **novenario** (incluida las Vísperas),<sup>3493</sup> se celebrarían

"...a mérito e intención de un particular y no de todo el Pueblo; viniendo por lo mismo a convertirse el beneficio de la institución [capellanía] en perjuicio de la comunidad".<sup>3494</sup>

De resultas de la litis, el Alcalde de Primer Voto Inocencio del Moral pagó con los ingresos de Propios la función del Santo y embargó a Medina los réditos de la capellanía. Según Medina, el agravio que él sufría era producto de una conspiración alimentada por los lazos de parentesco que unían entre sí a los miembros del Cabildo de La Rioja. Inocencio del Moral era "...tío carnal del actual Alcalde de Primer Voto y este [último] tío en segundo grado de los dos anteriores, todos consanguíneos y el regidor diputado [Baltasar Agüero] estrechísimo paniaguado de todos ellos".<sup>3495</sup> Para Medina toda

institución Patronada debía ser "...útil y no onerosa al instituido, [pues] cualquier mercenario es digno de premio y jornal, y mucho mas el que es llamado a una obligación perpetua sin otro objeto que la fundación liberal del instituyente".<sup>3496</sup> Por el contrario, para Agüero, fundado en Febrero Bermúdez (1778-81), la capellanía debía ser gratuita, como en el Albaceazgo,

"...porque entre el testador y el ejecutor de su última voluntad se celebra un verdadero contrato de mandato que como motivado por la confianza, amistad o piedad es de suyo gratuito y de lo contrario degeneraría y se convertiría en alquiler".<sup>3497</sup>

## **CH-V Conflictos entre el clero secular y el clero regular.**

En Buenos Aires, en 1765, el Gobernador Pedro Antonio de Ceballos mantuvo con el Obispo Manuel Antonio de la Torre un serio conflicto a raíz de que el segundo quiso cambiar la costumbre de dar la paz conjuntamente al gobernador y al diocesano.<sup>3498</sup> Trece años más tarde, en 1778, constituida Buenos Aires en capital de Virreinato, al concurrir los capitulares a la misa de Cuaresma, recibieron la paz de manos de un acólito, en lugar de un sacerdote, como se estilaba en Lima, capital del Virreinato del Perú.<sup>3499</sup> Para la misma época, en Córdoba, capital de una Gobernación-Intendencia, los Regidores José Benito de Acosta,<sup>3500</sup> y Estéban Montenegro,<sup>3501</sup> pertenecientes a la antigua facción de los Echenique, fueron multados por el Cabildo Eclesiástico --aparentemente un aliado de la facción allendista-- por no haber asistido a las Vísperas de la Publicación y Predicación de la Santa Bula.<sup>3502</sup> Quince años más tarde, en 1784, en Asunción del Paraguay, cuando en una función de tabla, en la Catedral, el Teniente Asesor Letrado, Dr. Lorenzo Grambel, en ausencia del Gobernador Pedro Melo de Portugal, mandó se le pusiese la silla, tapete y almohada o cojín, el Arcediano le contestó "...que el Sr. Gobernador había pasado oficio a aquel Venerable Cuerpo previniéndole que respecto de dicho asiento le correspondía [a él], por el Real Vice Patronato, que reservaba en sí".<sup>3503</sup> Viendo Grambel que esta prevención era en manifiesto desaire suyo, y "...rebaja de las prerrogativas correspondientes a mi empleo", pasó oficio al Cabildo Eclesiástico exponiendo los fundamentos con que en el pasado había usado de aquellas distinciones. Dichas distinciones comprendían: 1) el uso de la silla y cojín; 2) la subrogación del Vice Real Patronato; 3) la representación de la Real Persona en los días que se representaban funciones de tablas; y 4) si a su nombre podía "...recibir los besamanos y hacer las demás demostraciones debidas a la soberanía, o si estas se deben practicar por el que queda mandando las Armas".<sup>3504</sup> Con respecto al segundo punto, el de la subrogación, Grambel entendía que en ausencia del Gobernador le quedaba todo el mando, comprendido el uso del Real Vice Patronato, y exceptuado sólo el mando Militar. Con respecto al tercer punto, Grambel no encontraba razón

"...para que sólo por estar el Gobierno ausente se omitan los omenajes tan justamente debidos a la Soberanía, en una Capital donde hay costumbre de hacerlo, y donde debe también quedar quien represente la Real Persona".<sup>3505</sup>

Una década más tarde, en 1796, se suscitó en Asunción un grave conflicto entre el clero secular y el clero regular. Entre ambos, se solían dar rivalidades en la administración de los sacramentos y en el ceremonial religioso.<sup>3506</sup> La licencia para predicar y confesar extra claustra y el orden en que debían tañirse las campanas durante las festividades religiosas fueron las funciones que más repercusiones tuvieron en el equilibrio interno de poder entre las ordenes religiosas y el episcopado. Dicho orden debía reflejar fielmente la jerarquía de

los diversos cuerpos que constituían la Iglesia. En vísperas de Corpus, el 28 de Mayo, se había acordado que durante la mañana de Corpus el Convento de Predicadores suspendiera los repiques de sus campanas hasta que en la Catedral "...se hiciese la señal de alzar en la Mesa Capitular", y por la tarde "...igual suspensión hasta el tercer repique de nuestra Catedral".<sup>3507</sup> Pero Fr. Pedro Antonio Ordóñez, el Prior del Convento de Predicadores, desairando lo convenido con el clero secular, ordenó pulsar sus campanas antes que en el coro de la Catedral comenzara la salmodia acostumbrada.<sup>3508</sup> No paró aquí el furor del Padre Prior, sino que añadiendo obras a palabras, "...mandó se diera el segundo repique con expresión de que fuese largo, que en las circunstancias, no fue tanto para convocar a los fieles, cuanto para que sonase largamente en los oídos de todo el Pueblo".<sup>3509</sup> Este desacato hizo que el Cabildo Catedralicio de Asunción denunciara, utilizando una reiterada metáfora organicista, que su Cuerpo, se hallaba "...profanado, porque está herido, vulnerado, y escarnecido".<sup>3510</sup> El Cabildo Eclesiástico era

"...en cuanto Cuerpo cabeza, y cabeza de otro cuerpo de muy extensas dimensiones; y un miembro de este mismo Cuerpo es el revelado contra su cabeza; este miembro díscolo le hace guerra; Este miembro revelado es el que hiere, vulnera, y desprecia a este Cuerpo, que es cabeza, intentando con audacia desautorizar esta cabeza, que es todo un Cuerpo".<sup>3511</sup>

Para la misma época, en Buenos Aires, en la fiesta de San Martín, el Obispo Manuel Azamor y Ramírez les negó la **paz** a los cabildantes, por haberse estos negado a hincarse al tiempo del *et incarnatus est*, cuando lo cantaba el coro.<sup>3512</sup> Cinco años más tarde, en 1794, y en Córdoba, el Obispo de Tucumán Angel Mariano Moscoso,<sup>3513</sup> asesorado por el Deán Gregorio Funes, coaligado con la facción dirigida por Ambrosio Funes, y en conflicto con la facción sobremontista, liderada por el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte, requería instrucciones a la Real Audiencia de Buenos Aires acerca de si el Gobernador debía primero dar las Pasquas al Prelado el Sábado Santo después de la Gloria, y si el Obispo debía cumplimentar los días de Besamanos con la etiqueta de pontifical,<sup>3514</sup> o de Capa Magna.<sup>3515</sup> Ante este inaudito reclamo Moscoso se preguntaba "...¿Qué principio de conexión o coherencia tiene la Capa Magna con su Visita de Urbanidad? ¿En que balanza ha equilibrado el peso de estas funciones?".<sup>3516</sup> El acto de visitar al Gobernador no exigía de parte de Moscoso

"...una obligación contrahida a esta clase de obsequio, sino a otro de la misma especie, y mejor diré, a una buena y efectiva disposición de ánimo para ejercitar con él mis atenciones, miramientos y respetos propios de mi educación".<sup>3517</sup>

El amor a la paz y buena armonía le hizo a Moscoso

"...tolerar en silencio contra la Ley, el humilde sufrimiento de esperarlo en la Iglesia con todo mi Cabildo el dilatado tiempo, que debe consumirse para que el Ayuntamiento vaya a su Casa distante más de dos cuadras, y lo conduzca con toda pausa y pomposidad".<sup>3518</sup>

Por el mismo principio de paz y armonía Moscoso había disimulado un ceremonial de Iglesia, "...en que vuestro Gobernador se ha apoderado del Yncensario y la patena, y donde se hallan confundidas las funciones del sacerdocio".<sup>3519</sup> Sobremonte, creía que el hecho que el Obispo lo visitara sin la Capa Magna, era "...un insulto cometido a su alta dignidad".<sup>3520</sup> En ello encontraba Moscoso, "...un no sé que de exorbitancias sobre las

vanidades comunes, que la hacen singular en su género".<sup>3521</sup> Hacía constar Moscoso, que en el traje reprendido por Sobremonte, habían hechos sus cumplidos

"...los muy Reverendos Arzobispos de Charcas a los Presidentes de aquella Real Audiencia; que yo mismo y el actual Metropolitano hemos cumplimentado en los dichos días de besamanos sin otra formalidad a vuestro Gobernador de Cochabamba".<sup>3522</sup>

Aspirar a los honores no exigidos de los Virreyes, era para Moscoso, "...una especie de idolatría de sí mismo, y un delito de insubordinación".<sup>3523</sup> Más aún, si el Patronato Real se derivaba con desigualdad según la calidad de los Magistrados, el que un Vice-Patrono de ínfima clase, como lo era un Gobernador-Intendente, precisara que los Prelados que lo visitaban usaran el traje de Capa Magna, no era mas que "...arrogancia y presunción".<sup>3524</sup> En cuanto al significado y legítimo uso que según las Instituciones de la Iglesia debe tener el traje de Capa Magna, Moscoso replicaba que la Iglesia

"....siempre atenta a mantener el orden y conservar esa decencia del culto exterior,..., no se ha descuidado en asignar a sus Ministros las vestiduras de que debían servirse en los diversos Ministerios, actos y funciones propias de su Instituto".<sup>3525</sup>

Los Ministros de la Iglesia eran hombres y "...formaban una parte del Estado civil, y así fue necesario darles un traje ciudadano, con que desempeñasen sus profanas obligaciones, aunque siempre conforme a su suerte y distinta de la común".<sup>3526</sup> Pero también eran Ministros del Santuario,

"...y como tales fué conveniente revestirlos de unos trages, que no tanto sirviesen al decoro de sus personas, quanto a la dignidad del dueño a quien pertenecían".<sup>3527</sup>

Nada habría más repugnante a la razón, para Moscoso, "...que los Ministros del Altar honrasen a los hombres en el mismo traje destinado a honrar a Dios".<sup>3528</sup> Sobre estos principios invariables procedía el Ceremonial Romano, el cual arreglaba "...con escrupuloso cuidado el vestido de los Obispos, asigna la Muzeta y Roquete,<sup>3529</sup> para todos los actos civiles".<sup>3530</sup> Y asignaba el uso de la Capa Magna para las principales fiestas religiosas. Sobre el siglo XVII, época en que las coronas de España y Portugal estaban unidas, Moscoso señalaba que

"...era universal el uso en los Prelados de un traje diario talar con una cauda [falda] larga dependiente de la Sotana,<sup>3531</sup> que todavía existe en Portugal, y se ha visto no ha muchos años en algunas Metrópolis de América".<sup>3532</sup>

Pero desde que los Nuncios Papales introdujeron las ropas comunes circulares o redondas, al estilo de Roma, "...esta indumentaria dexó de usarse en la Corte y demás Diócesis de España".<sup>3533</sup> Siendo la Capa Magna tan privativa de la Iglesia, Moscoso se preguntaba finalmente "...¿como podría entenderse de la Capa Magna, [si] cuando se presentan los Reverendos Obispos ante la Real persona de V.M. jamás se les ha visto en este traje?".<sup>3534</sup>

## **CH-VI La ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas.**

La ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas daban lugar también a sospechas de corte ideológico y moral. En Jujuy, en 1794, el Cabildo Eclesiástico acusaba al Ayuntamiento de irreligiosidad por no haber asistido a la función de tablas, en virtud de encontrarse los regidores ocupados en las elecciones capitulares.<sup>3535</sup> El abogado del Cabildo de Jujuy Mariano Moreno, replicaba que no podía

"...confundirse la falta de asistencia a una función de tabla con el desprecio de la Religión, [y] resulta manifiesto el exceso de los Curas por haber aplicado al primer caso unas expresiones, que aún en el segundo serían intolerables por el modo altanero con que se proferían".<sup>3536</sup>

El Cabildo secular o ayuntamiento de Jujuy era para Moreno

"...el único Cuerpo representativo de aquella ciudad; es la única imagen que en el ejercicio de sus facultades recuerda al Pueblo el original de su Monarca, es la única autoridad por cuyos respetos debe formar el Pueblo la escala de comparación hasta llegar a su Rey".<sup>3537</sup>

Eran estas unas consideraciones muy poderosas para no imponer en las funciones de tabla la prefixación de hora. La alta dignidad de los Cabildos Eclesiásticos respecto de los Seculares no se podía poner, según Moreno, como excusa, pues "...siguiendo una justa proporción no debe negar un Cura a un Cabildo, lo que un Arzobispo está obligado a tributar a un Presidente [de Real Audiencia]".<sup>3538</sup>

También en Córdoba, en 1797, y con motivo de la celebración de las Pascuas, se suscitaron conflictos alrededor de la presencia de las autoridades capitulares en oficios religiosos. En oportunidad en que el Obispo de Córdoba le exigió al Cabildo secular de aquella ciudad lo felicitase por las Pascuas en Cuerpo Capitular, el Alguacil Mayor Antonio de las Heras Canseco,<sup>3539</sup> y el Regidor José Prudencio Xijena,<sup>3540</sup> conjuntamente con el Regidor José Manuel Salguero,<sup>3541</sup> fueron convictos y confesos de una tacha legal: la de haberse sometido siendo individuos de aquel Cabildo a declarar bajo juramento ante la Jurisdicción Eclesiástica, contra las regalías de su propio cuerpo, es decir contra lo prescripto por el Patronato Real. Como los miembros del Cabildo no concurrieron, el Obispo mandó levantar una Sumaria Información en la Curia Eclesiástica, lugar donde Canseco, Xijena y Salguero fueron a someterse y jurar a beneplácito del Prelado. Como las Leyes del Patronato Real prohibían el que en cosas profanas se sometieran los legos a la jurisdicción eclesiástica so pena de condenarlos a perder sus empleos y temporalidades, el abogado Pérez de Saravia, concluía que "...estos regidores no sólo quebrantaron las leyes de su estado secular y los fueros de su cuerpo, sino que también fomentaron la usurpación que se hizo del Vice Real Patronato".<sup>3542</sup> Cada uno de estos motivos eran, para Pérez de Saravia, "...muy poderosos para inhabilitar a estos regidores no sólo de sufragar sino de obtener qualesquiera empleo en la república según las leyes fundamentales de nuestra nación".<sup>3543</sup> Pero no obstante las tres impugnaciones detalladas, Canseco, Xijena y Salguero fueron confirmados por el Gobernador Interino de Córdoba Nicolás Pérez del Viso. Apelada su decisión ante la Real Audiencia de Buenos Aires, ésta anuló la misma, e inmediatamente le ordenó al Gobernador convocar a nuevas elecciones.<sup>3544</sup>

El Cabildo de Córdoba fue en esta ocasión capaz de prevalecer contra la voluntad de su gobernador y su obispo, poniéndolos a estos últimos contra la voluntad de la Real Audiencia de Buenos Aires. Pero el Gobernador-Intendente Pérez del Viso nombró de Alcalde Interino hasta verificarse la nueva elección al mismo de la elección anulada, y en

el acto de la calificación de la nueva elección participaron los mismos que fueron tachados en la calificación de comienzos de año, sin que los tachados hubieren sido excluidos por el Gobernador. De resultas de la nueva elección se eligieron los mismos que habían sido anulados.<sup>3545</sup> Una particular consideración sobresale en lo que respecta a esta crisis del Cabildo de Córdoba. Ella fue estimulada por la naturaleza contradictoria del estado colonial en su relación con el aparato burocrático de la Iglesia Católica. Pero lo notorio de esta crisis fue que, frente a la extrema debilidad del estado colonial, afectado por la embestida de las potencias europeas emergentes, el Gobernador se vio precisado a cerrar filas con la Iglesia, confirmando a aquellos regidores que se habían prosternado ante el Obispo. De igual manera, la debilidad relativa del Cabildo de Córdoba, frente al creciente poder del Gobernador-Intendente de Córdoba, hizo que aquel extendiera el conflicto apelando las decisiones de este último ante la Real Audiencia de Buenos Aires.

## **CH-VII La etiqueta que debían regir los actos universitarios.**

En cuanto a la etiqueta que debían regir los actos universitarios, un sub-orden de la corporación eclesiástica últimamente subordinada al Patronato Real, también tuvo lugar una profusa jurisprudencia en los conflictos que se dieron entre las autoridades universitarias mismas, léase Rectores y Lectores. La diversidad de concurrencias y actos en las universidades obedecía a la diversidad de facultades que se enseñaban. Había según el Rector Pantaleón García,

"...concurrencias y actos de Teología, y a estos sólo concurren los catedráticos de Teología con exclusión de los de Derecho. Hay concurrencias y actos de exámenes de Jurisprudencia a que sólo asisten los catedráticos de esta Facultad con exclusión de los de Teología".<sup>3546</sup>

En los actos o exámenes que son de Teología, como las **Ignacianas**, **Parténicas**, y **Sabatinas**,

"...faltando el Rector preside el catedrático de prima,...sin que hayan concurrido a ellos los Catedráticos de Letras por no ser exámenes o actos de su facultad, como tampoco han concurrido por la misma razón a los actos o exámenes de Derecho los catedráticos de Teología".<sup>3547</sup>

Pero fuera de estas concurrencias, independientes las unas de las otras, había otras más, como la de colación de grados, en que la universidad concurría colegialiter, es decir "...en un cuerpo los catedráticos de Teología y de Letras".<sup>3548</sup> Fue en estas funciones que en Córdoba se produjeron conflictos alrededor de quién los debía presidir. Es falsísimo, decía García, que en estos actos "...el Lector de prima de Teología haya presidido siempre, y suplido la ausencia del Rector, sino que lo ha hecho el catedrático más antiguo ya sea de Teología ya sea de Derecho".<sup>3549</sup> También se originaron conflictos alrededor de la naturaleza pública o privada de los exámenes conocidos como Parténicas. En la Universidad de Córdoba, a falta de generala, los actos públicos se tenían en la Iglesia "...y replican en ella los Padres Lectores de los Conventos".<sup>3550</sup> La **Parténica** en discusión entre el Padre Braco y el Rector García, fue a juicio de este último, "...sólo en la clase de leyes, con sola asistencia de los catedráticos y cursantes de Leyes sin asistencia de la universidad, ni de los catedráticos ni causantes de Teología".<sup>3551</sup> Había sido "un acto privado", para el cual la Celda Rectoral "...es capaz y bien dispuesta, y en la que se tienen repetidamente exámenes privados de todas facultades".<sup>3552</sup>

En conclusión, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda estratificación en la distribución de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de la sociedad colonial. La discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras discriminaciones gobernadas por la pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino desde una sociedad estamental hacia una sociedad de clases.

## **Epílogo Sección II-A**

Podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII aquí relatadas, que la causa eficiente de dichas fisuras fue por lo general el cerrado comunismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas y el colapso del orden imperial-absolutista, pues lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente.

Asimismo, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda estratificación en la distribución de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de la sociedad colonial. La discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras discriminaciones gobernadas por la pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino desde una sociedad estamental hacia una sociedad de clases.

## **Sección II-B      Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista**

El proceso de diferenciación interna de la población, la consolidación del patriciado, y la emergencia de una embrionaria burguesía, no habría podido desarrollarse debido principalmente a los obstáculos que le oponían elementos ideológicos e instituciones jurídicas, alimentados a mi criterio por relaciones etnológicas de naturaleza patriarcal, patrimonial, señorial, mercantilista, estamental y nepótica. El pasaje de patriciado a burguesía encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX.<sup>3553</sup> Es nuestra hipótesis, entonces, que al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva Granada y Venezuela, y por Halperín Donghi (1979) para el Río de la Plata, y a diferencia de lo sostenido para esta última región por Zorraquín Becú (1961), Stoetzer (1966), Mörner (1980) y Chiaramonte (1982,1989), las frecuentes consideraciones acerca de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y las Capellanías, y por

los retratos y tanteos, debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario.

En ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en Buenos Aires y el interior del Virreinato del Río de la Plata, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas internas intra-familiares la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales civiles y eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.<sup>3554</sup>

Así como en la sección anterior hemos estudiado las fracturas del orden barroco, en esta sección nos dedicamos a investigar la crisis del patriarcado tomando como caso testigo la conflictividad eclesial, desarrollada en tres sucesivos capítulos: el régimen capellánico y sus pautas hereditarias de la primogenitura y la varonía, los conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, y las fisuras entre el fuero eclesiástico y el orden regalista (Patronato Real.)

## Capítulo II-B-5      **Régimen capellánico y pautas patriarcales de la primogenitura y la varonía**

### Índice

- D-I Tradición historiográfica en materia de crisis dinástico-capellánica
- D-II Marco legal de las capellanías
- D-III Derecho de representación
- D-IV Sucesión de los beneficios

### **D-I Tradición historiográfica en materia de crisis dinástico-capellánica**

La naturaleza de la sociedad colonial fue en nuestra historiografía, desde fines del siglo XVIII, motivo de denodados conflictos. Concolorcorvo (1773), uno de los primeros viajeros en relatar sus impresiones del Río de la Plata, manifestó no saber que en esa región existiere mayorazgo alguno.<sup>3555</sup> Casi cuarenta años más tarde, Azara (1809) fue el primer intelectual, conocedor del Río de la Plata, que repitiendo la afirmación de Concolorcorvo, dio fundamento a la posteriormente denominada excepcionalidad argentina, descubriendo la existencia de igualdad en el Río de la Plata.<sup>3556</sup> Sostenía Azara, quien sin duda debía hallarse muy influido por la lectura de Jovellanos (1794),<sup>3557</sup> que entre los españoles (incluye los criollos blancos) radicados en esta región de la América Española reinaba "...la más perfecta igualdad, sin distinción de nobles ni de plebeyos. No

se conocen entre ellos ni feudos, ni sustituciones ni mayorazgos".<sup>3558</sup> También Brackenridge (1927), un diplomático Norteamericano que escribió unas Memorias de Viaje por América del Sur, repite a Azara al afirmar que no había en Buenos Aires "...familias de viejo arraigo" y que "...la igualdad general dominante parecía atraer a los hombres a una unión más estrecha".<sup>3559</sup> Descartada la obvia desigualdad étnica entre blancos y miembros de las castas, marcada por la línea del color, la desigualdad entre los mismos españoles era desconocida tanto por Azara como por Brackenridge. ¿Era esta percepción real o estuvo encubierta por el auge mercantil vigente en los años que Azara y Brackenridge escribieron sus Memorias?. Responder a este interrogante es parte del trabajo de este escrito.

Las afirmaciones de Concolorcorvo, de Azara y de Brackenridge fueron repetidas indistintamente por un sinnúmero de historiadores, ensayistas y políticos, sin beneficio de inventario alguno. A mediados del siglo pasado, apremiados por la necesidad política de manipular ficciones orientadoras,<sup>3560</sup> Berro (1843-51), Mitre (1859) y Alberdi (1886) reiteraron los juicios de Azara y de Brackenridge.<sup>3561</sup> López (1883), sin citar a Azara, pero por intermedio de su padre, el político y poeta Vicente López y Planes,<sup>3562</sup> un testigo de la época, se refiere al grupo dirigente de Buenos Aires en tiempos del Virrey Vértiz, como a una clase de "enriquecidos", sugiriendo con esa generalizada caracterización lo opuesto a una aristocracia, que según el mismo López requería para su formación cuatro o cinco generaciones.<sup>3563</sup> Y a fines del siglo pasado, en plena efervescencia del positivismo y del progreso indefinido, Ramos Mexía (1887) llegó a afirmar, fundado en estas mismas expresiones de Azara, consagradas por Mitre, López y Alberdi, que merced a que el núcleo de la sociedad Rioplatense fue siempre español, a diferencia de aquellas otras regiones donde hubo que conquistar civilizaciones indígenas como la Incásica, pudo en ella

"...subsistir la igualdad y dar a su sociabilidad ese carácter democrático e industrial que la caracteriza y que tanto diversifica la sociabilidad del país argentino de la del Perú y Chile".<sup>3564</sup>

Pero la lectura que Mitre, Alberdi y Ramos Mexía no hicieron de Azara es cuando dos páginas más adelante, del mismo escrito, este último autor afirma que en dicha región de América "...muchas personas fundan durante su vida gran número de capellanías eclesiásticas o legas".<sup>3565</sup> Estas fundaciones, agregaba Azara, "...aumentan [en su número] de manera, que tal carga será pronto inaguantable en aquel país".<sup>3566</sup> La carga a que se refería Azara en este profético párrafo era en apariencia puramente financiera. Así como el mayorazgo era según Azara --fuertemente influido por el pensamiento fisiocrático-- un grave obstáculo para el desarrollo agrícola; las capellanías preanunciaban --por analogía-- los obstáculos económicos que significarían para el desarrollo urbano de Buenos Aires.<sup>3567</sup> No obstante esta reflexión, Azara eludió considerar explícitamente en ese extraviado párrafo la carga social que --para el naciente espíritu capitalista-- implicaría la desigualdad generada en la familia rioplatense por los mecanismos gentilicios y dinásticos,<sup>3568</sup> vigentes en la designación de los patronos capellánicos, en la aplicación de la legislación matrimonial (Real Pragmática),<sup>3569</sup> y en la vigencia del derecho de abolengo (tanteo,<sup>3570</sup> y retracto,<sup>3571</sup>).

Pero es recién a comienzos del siglo XX que se reinicia en Buenos Aires una lucha ideológica acerca de la herencia sociológica dejada en la América española por el régimen colonial, entre una corriente crítica hegemonizada primero por García (1900), seguida luego por Rivarola (1905, 1908), Justo (1915), Ingenieros (1918), y Varetto (1922),

continuada a mediados de este siglo por Puiggrós (1940), Romero (1946), Bagú (1952) y Peña (1970); y otra corriente de pensamiento oficial liderada por el mismo Ramos Mexía (1887), y autores positivistas como Bunge (1903,1913) y Ayarragaray (1904,1920).

Esta lucha ideológica no cesó en la última post-guerra ni ha cesado aún en la historiografía Rioplatense.<sup>3572</sup> En un claro intento por desvirtuar la naturaleza patriarcal, patrimonial, nepótica, señorial y estamental de la sociedad colonial rioplatense y desvalorizar una hipotética naturaleza radical de la Revolución de Mayo, tanto Palacio (1954,1965) como Zorraquín Becú (1961), aseguraron que los propósitos de los revolucionarios no fueron sociales ni económicos, sino eminentemente políticos. Palacio --fundado en López (1883), y en el testimonio de un funcionario de la corona (Miguel Ignacio Fernández) que no alcanzó a arraigarse-- se refirió a la elite colonial porteña con el desprecio de un "hidalgo" del interior. Ignorando la verdadera base material que sustentaba el prestigio social de su propio antecesor,<sup>3573</sup> Palacio caracterizó a esta elite como "aristocracia hortel", y a sus miembros como "...advenedizos en el orden del linaje y de la cultura", sugiriendo con ello, aunque desde una perspectiva ideológica distinta, el mismo igualitarismo que Azara y Brackenridge observaran.<sup>3574</sup> En tanto que para Zorraquín, influido por Palacio, la Revolución no tuvo el aspecto de una lucha social entre clases diversas y opuestas --tesis sorprendentemente similar a lo que sostuvo antes Heisse (1951) para el caso Chileno-- pues los revolucionarios

"...ni querían perseguir a otras clases, ni aspiraban a implantar reformas fundamentales en el régimen de propiedad, el trabajo, o el comercio. Querían en cambio organizar un gobierno propio --lo cual tenía que conducir tarde o temprano a la independencia-- y orientar a ese gobierno conforme a las ideas que entonces predominaban universalmente".<sup>3575</sup>

Romero (1946), Corona Baratech (1951), Mariluz Urquijo (1970) y Molina (1991), este último en forma póstuma, reiteraron las tesis de Azara y de Brackenridge.<sup>3576</sup> Mariluz Urquijo, sin citar a Azara, pero apoyado en Luque Colombres (1948), concluyó que en el actual territorio argentino, el número de mayorazgos fue aún más exiguo que en México y Chile.<sup>3577</sup> Halperín Donghi (1979) es el primero en advertir lúcidamente lo erróneo del cuadro descrito.<sup>3578</sup> El caso de Socolow (1978) es diferente, pues se contradice. Si bien por un lado Socolow afirma que las capellanías fueron utilizadas en Buenos Aires como sustitutos de los mayorazgos,<sup>3579</sup> por otro lado niega en la misma obra que los comerciantes Porteños hubiesen establecido vinculaciones.<sup>3580</sup> Finalmente, Mörner (1980,1989), sin citar a Halperín, llegó a afirmar, sobre la base de Azara, que el espíritu del capitalismo "...sin todo el recargo 'feudal'",<sup>3581</sup> vio en la región Rioplatense previa a la revolución de Mayo, un campo propicio para su desarrollo, por el hecho de carecer en forma completa de mayorazgos.

No obstante estos argumentos, en la América Hispana, el proceso de diferenciación interna de las clases sociales, y el crecimiento de una burguesía, no habría podido desarrollarse debido principalmente a los obstáculos que le oponían elementos ideológicos e instituciones jurídicas, alimentados a mi criterio por concepciones patriarcales, patrimoniales, señoriales, estamentales y nepóticas del poder político y social. El pasaje de patriciado a burguesía encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX.<sup>3582</sup> Es nuestra hipótesis, entonces, que al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva Granada y Venezuela, y por Halperín Donghi

(1979) para el Río de la Plata, y a diferencia de lo sostenido para esta última región por Zorraquín Becú (1961), Stoetzer (1966), Mörner (1980) y Chiaramonte (1982,1989), las frecuentes consideraciones acerca de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y las Capellanías, y por los retractos y tanteos, debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario. En ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en Buenos Aires y el interior del Virreinato del Río de la Plata, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas internas intra-familiares la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales civiles y eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.<sup>3583</sup>

Amén de la animadversión contra la Corona y la Iglesia, provocada por el creciente endeudamiento generado por los censos y las capellanías, y la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, motivos estudiados en otros trabajos de este autor,<sup>3584</sup> la animosidad de los criollos segundones no clérigos, o de los clérigos de ordenes menores, o de aquellos sin congrua,<sup>3585</sup> o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de las capellanías, contra la modernidad colonial-absolutista, habría obedecido también a los innumerables conflictos generados a causa de los mayorazgos implícitos en los patronatos capellánicos y en el derecho de abolengo (retracto y tanteo). Continuando estas reflexiones, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronatos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas líneas o ramas familiares en detrimento de otras, a los hijos mayores en detrimento de los menores, a los hijos clérigos en detrimento de los hijos militares o de los letrados no clérigos, y a los varones en detrimento de las mujeres, contribuyeron o no a generar un profundo resentimiento, a engendrar una creciente lucha interna, y a fortalecer un régimen político y social señorial, patrimonial, patriarcal, clerical, estamental y corporativo. Para ello hemos debido estudiar un par de centenares de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalcias seculares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).<sup>3586</sup> También nos hemos servido de la información histórico-genealógica que nos proveen que nos proveen diversos tratados,<sup>3587</sup> y los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>3588</sup> Lamentablemente, el criminal incendio del Archivo de la Curia Arquidiocesana de Buenos Aires, acontecido en 1955, nos ha privado de invalores fondos judiciales eclesiásticos.<sup>3589</sup> El intenso endeudamiento contraído en favor de la iglesia y de las ordenes religiosas a través de las capellanías,<sup>3590</sup> totalizaron en Córdoba cerca de un centenar de fundaciones entre 1643 y 1884; en La Rioja quince; en San Juan media docena; y en Buenos Aires unas 757 fundaciones, registradas notarialmente entre 1600 y 1820.<sup>3591</sup> Este endeudamiento se complementaba con el contraído a través de los censos (ambas instituciones estudiadas en otros trabajos de este autor), y con la afiliación religiosa a las Ordenes Terceras, lo cual

reforzaba aún más el prestigio del deudor, esencialmente derivado de su patrimonio material.<sup>3592</sup>

## **D-II El marco legal de las capellanías**

Las capellanías o fundaciones capellánicas eran una forma puramente española de la vinculación de bienes, pudiendo ser las mismas laicales o eclesiásticas.<sup>3593</sup> Las laicales, mercenarias o de sangre eran aquellas capellanías erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica, donde sus bienes se consideraban como propiedad familiar y conservaban la calidad de temporales, y en donde el patrono gozaba del usufructo de los bienes con cargo de pagar las misas o cumplir sus obligaciones, y el capellán era meramente depositario de los bienes de la misma.<sup>3594</sup> Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto su sucesión se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía (patrilinealidad) y la Limpieza de Sangre (alcurnia y legitimidad), y sus frutos se aplicaban para la pensión exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Por el contrario, las capellanías eclesiásticas o espirituales eran las erigidas por eclesiásticos y se consideraban como propiedad clerical.<sup>3595</sup> Este tipo de capellanía, podía ser colativa o de patronato. Las colativas eran aquellas cuyos capellanes estaban librados a la elección del obispo; y las de patronato, aquellas cuyos patronos tenían el derecho activo de presentar, con anterioridad a la colación,<sup>3596</sup> los capellanes que debían servirla, y disfrutar o alimentarse de sus productos. Su rol era consolidar la honra de la Iglesia o de determinadas ordenes religiosas, cofradías o hermandades, por asignar sus réditos para mantener a un capellán que celebrara misas en memoria del alma del fundador. Pero según el Cardenal de Luca (1684), la sola carga de decir misas no era una condición que las constituyera en sacerdotales.<sup>3597</sup>

En cuanto a la naturaleza del Patronato, hay quienes sostenían que cuando la capellanía era laical, el patronato también era laical, y que cuando era eclesiástica, el patronato dejaba de ser laical. El Dr. Vicente Anastasio de Echevarría replicó en 1857 afirmando que "...sea del carácter que fuese la institución, el Patronato siempre es cosa laical y no tiene que ver nada con que la capellanía sea eclesiástica o lega".<sup>3598</sup> La capellanía lega o laical, a juzgar por la presentación hecha en 1784 por Joaquín Legal y Córdoba, a nombre de Julián Clemente Rodríguez,<sup>3599</sup> en los autos contra su hermano carnal Pedro Alcántara Rodríguez,<sup>3600</sup> era la única que podía reforzar el prestigio familiar y el "honor y dignidad temporal", por guardarse en su sucesión el orden de los mayorazgos.<sup>3601</sup> Asimismo, el patronato era un derecho adquirido, del cual no se podía desposeer a aquél a quien se lo hubiere granjeado, sin agravio del derecho de propiedad. Para privar a alguien de este derecho era preciso que hubiere "...incurrido al menos en culpa, que le haga indigno por aquella vez de presentar capellanes".<sup>3602</sup> Luego que en 1836 quedó vacante la capellanía establecida por Francisco Rodríguez, albacea de Juana Rufina Silva, y Lorenzo Rodríguez Conde entró a ejercer los derechos de patrono, para cuatro años después, en 1840, tener que abandonar el país por razones políticas; su parienta Teresa González de Conde aprovechó su ausencia para usurpar el mismo, gozando desde entonces de sus beneficios.<sup>3603</sup> Ocho años después, en 1848, regresado del exilio, Don Lorenzo entabló demanda judicial, de resultas de la cual el Juez Dr. Manuel Antonio Mansilla condenó a la usurpadora y lo reconoció a Don Lorenzo como Patrono.<sup>3604</sup> En cuanto a la institución de los capellanes, para los Obispos era forzoso instituir a aquellos presentados por los Patronos y no a otros, so pena de nulidad.<sup>3605</sup> Para postergar a un

capellán presentado por un Patrono era de rigurosa justicia "...juzgar primero con conocimiento de causa y audiencia del patrono, sobre haber perdido el derecho que le concedía la fundadora".<sup>3606</sup>

Cuando en una causa profana, como era el caso de una sucesión de bienes en que se hallaba afincada una capellanía lega, la participación de un Juez Eclesiástico --a juicio del Dr. Manuel C. Pizarro, fundado en las obras de Fr. Benito Feyjoo (1726-40) y del Conde de la Cañada (1793)-- ocasionaba "fuerza", y en tal caso les cabía a los perjudicados por la intervención eclesiástica el llamado Recurso de Fuerza.<sup>3607</sup> Por el contrario, en la capellanía eclesiástica, al "...aplicarse todos los frutos para la pensión de misas" y ser sus causas "propiamente pías", y al no guardarse el orden de los mayorazgos por no "...admitirse mujeres, ni otras muchas personas estólicas e incapaces", se trataría de reforzar "...la honra de la Iglesia y de todo el estado eclesiástico",<sup>3608</sup> y no les cabría por ende el Recurso de Fuerza.

En algunos casos, los fundadores hacían dos clases de llamamientos distinguiendo en la escritura de fundación los llamamientos de patronos de los llamamientos de capellanes. En Buenos Aires, en 1833, con motivo del testamento otorgado en el siglo XVIII por María Báez de Alpoin y Labayén, viuda del General Alonso de Arce y Arcos,<sup>3609</sup> el Dr. Félix Ignacio Frías, a nombre del Dr. Estéban Agustín Gazcón,<sup>3610</sup> en autos con Agustín Pinedo y Arce,<sup>3611</sup> advirtió que la fundadora había hecho dos clases de llamamientos. Para el de patrono eligió y nombró en primer lugar a su marido el General Arce y Arcos, abuelo de Gazcón y de Pinedo, en segundo lugar a su hijo varón Felipe Santiago de Arce, y por falta de ambos a todos sus nietos. De modo que no podía caber duda que en falta de los dos primeros el Patronato debía corresponder a Agustín Pinedo como nieto mayor de la fundadora. Frías sostenía que faltando Don Alonso y Don Felipe Santiago de Arce, primeros Patronos, resultaba "...de la necesaria conexión que tenía la cláusula 9 con la 10, que el que fuese capellán sería Patrón, y el que Patrón capellán".<sup>3612</sup> La cláusula 9 decía que

"...serán Patronos todos sus nietos, corriendo la escala hasta el último en la forma que a cada uno le corresponda, según la acción y derecho que irá declarado para graduación y goce de dha capellanía y Patronato",

y la cláusula 10 que "...fuese capellán en primer lugar preferido como dueño su nieto Joaquín Mariano Valdés,<sup>3613</sup> y por su falta el primero que fuese de la Iglesia sucesor de sus tres hijos".<sup>3614</sup> Es visto entonces que la graduación y goce señalado para el Patronato era la misma que la señalada para la capellanía, sin que hubiere facultad para dividir estos derechos en diversas personas. De manera que llegado el caso, como sucedió en esta fundación,

"...debió reputarse calidad indispensable para obtenerla la de ser eclesiástico; o según la carrera eclesiástica, sin que puedan gozarla los legos (variación sustancialísima que ha causado el auto en que se declaró que no hacía fuerza el discreto Provisor) es absolutamente incuestionable que el que tiene derecho a suceder al primer Capellán nombrado Don Joaquín [Valdés], lo tiene también al Patronato".<sup>3615</sup>

Cuando el patronato de una capellanía quedaba vacante por muerte de su titular y extinción o agotamiento de la línea sucesoria llamada a detentarlo, se citaba o llamaba en términos perentorios a los que se creían con derecho al patronato, por medio de edictos, que en

aquel entonces se fijaban en los atrios de las parroquias y en los parajes públicos. De no presentarse ningún postulante, el patronato era declarado vacante, recayendo en el Obispo el rol de patrono. En el caso de la capellanía de Santa Bárbara, fundada en San Juan en 1753 por Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Álvarez de Miranda, el Pbro. Vicente Atencio asimilaba en 1813 la ausencia prolongada a una renuncia tácita. Atencio alegaba contra la opinión de José María de Echegaray y Toranzos,<sup>3616</sup> que la actitud de su hermano el Pbro. Manuel de Echegaray, de

"...marcharse sin la venia de su prelado, no dejar disposición alguna sobre su beneficio, no sustituir en su oficio, ni autorizar a un hermano para este especial negocio y ocultarse de un modo que más verosímil es su muerte que su existencia",<sup>3617</sup>

equivalía a dejar "...los indicios más claros de su resolución de separarse para siempre".<sup>3618</sup> En caso de recaer el patronato de una capellanía en menores de edad, el Alferez de Dragones Tomás Alonso,<sup>3619</sup> estableció en Buenos Aires, en la que él fundara, que mientras durara la minoridad cuidará el cumplimiento de sus cargas el representante que "...a la sazón sea el Cura Rector de la Parroquia de la Catedral".<sup>3620</sup>

### **D-III El Derecho de Representación**

La comparación entre los derechos a la sucesión de un mayorazgo o a una testamentaria y los derechos a la sucesión de un patronato capellánico, fué tratada extensamente por diversos juristas y canonistas. Para mejor tratar dicha comparación los juristas estudiaron las distintas variantes del derecho de representación. Este derecho era una ficción legal que producía el efecto de "...hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese",<sup>3621</sup> y tenía también el efecto de hacer entrar "...a herederos lejanos del causante, que de otra manera serían excluidos, por los que ocupan grados más cercanos".<sup>3622</sup> En las capellanías eclesiásticas, dice García (1618,1735), "...no se sucede por representación como en los Mayorazgos sino cada uno por propia persona".<sup>3623</sup>

Entre las producciones de los juristas criollos que analizaron el mismo tema, que hoy queremos rescatar del olvido, se hallan las de los Pbro. José Felipe Funes,<sup>3624</sup> y José León Banegas,<sup>3625</sup> y la del Fiscal de Cámara Ernesto Quesada. En efecto, para Funes, en un dictamen fechado en 1811, mientras que en las capellanías, en especial las capellanías eclesiásticas, no existía derecho de representación,<sup>3626</sup> y la proximidad del parentesco que regulaba o daba el derecho era con respecto al fundador; en los mayorazgos, y según algunos en las capellanías legas, había derecho de representación, y la inmediación del parentesco que decidía en juicio era respecto del último poseedor.<sup>3627</sup> En el pleito suscitado en Buenos Aires entre Gregoria Gázquez, viuda de Manuel Cueli, y Antonina Bojórquez, madre de Juan Cueli,<sup>3628</sup> el apoderado de esta última, Pbro. José León Banegas, había alegado en 1851 que el derecho de representación, se daba sólo en las capellanías legas.<sup>3629</sup> Y en el pleito suscitado en 1853 entre Josefa Muñoz de Arriola,<sup>3630</sup> y su tía paterna Josefa Muñoz y Pérez,<sup>3631</sup> sobre el patronato de la capellanía fundada en 1797 por Ignacia González Bautista,<sup>3632</sup> la primera alegaba con el patrocinio del Dr. Correa que su tía olvidaba a su padre "...hermano de ella, y mayor en edad, y olvida el derecho de representación que me da la Ley 40 de Toro, para entrar a ponerme en el lugar, sexo y grado de dicho mi finado padre".<sup>3633</sup> Más luego, en la demanda entablada por Petrona F. Echenagucia,<sup>3634</sup> por el patronato de la capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por

Don Marcos Miguens,<sup>3635</sup> el Fiscal de Cámara Ernesto Quesada ratificó la jurisprudencia sentada por Funes y Banegas emitiendo un dictamen, por el cual los derechos sucesorios a un patronato capellánico no pueden equipararse de modo absoluto con los derechos a una testamentaria o a un mayorazgo.<sup>3636</sup> Mientras que esta última

"...implica la transmisión de todos los derechos activos y pasivos de una persona muerta a la persona sobreviviente llamada por la ley o por el testador a recibirlos, donde la personalidad del muerto desaparece por completo y su caudal ingresa y hace parte de aquel que lo sucede",<sup>3637</sup>

aqué otro, el patronato capellánico, estaba constituida por

"...un simple derecho que se trasmite, sobre el cual pesa una carga, y donde la personalidad del instituyente no desaparece por completo y su voluntad subsiste siempre sobre su descendencia, cualquiera que sea la línea y el grado de ésta, a los efectos jurídicos del cumplimiento de la carga impuesta al Patrono: diríase un mandante perpetuo cuyas ordenes acata el mandatario a través de los tiempos y de las generaciones".<sup>3638</sup>

Esta sentencia fue revocada en 1907 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con la sola disidencia del Dr. Luis Méndez Paz.<sup>3639</sup>

En la elección del Patrono era donde las fundaciones capellánicas se prestaban a las discusiones más agrias, motivo central de este trabajo. En Córdoba, la crisis desatada en su Cabildo en 1766 obedeció en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía de \$2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.<sup>3640</sup> Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.<sup>3641</sup> Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.<sup>3642</sup> Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el reembolso de la suma correspondiente.<sup>3643</sup> A mediados del siglo XVIII, el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez,<sup>3644</sup> debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel Manuel de Castro,<sup>3645</sup> por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la Chacra Grande, ubicada en La Rioja.<sup>3646</sup> Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía "...a sus consanguíneos desde el primer grado hasta el último procediendo por todos grados y líneas hasta dar con el más ínfimo según la ley de sucesión".<sup>3647</sup> Sólo una vez extinguida su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad "...para que nombren Patronos ad libitum".<sup>3648</sup> Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a Castro para ser Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".<sup>3649</sup> La capellanía fundada en 1798 por el Pbro. Ignacio Acosta,<sup>3650</sup> fue reclamada en 1844 en los estrados de Buenos Aires por su sobrino el Pbro. Juan Antonio Martínez.<sup>3651</sup> En Buenos Aires, con posterioridad a la Asamblea de 1813 y a las reformas eclesiásticas de Rivadavia, en 1836, Anastasia Franco de la Isla litigó con el Dr. Matías Vicente Oliden,<sup>3652</sup> por el patronato de una capellanía.<sup>3653</sup> Y a fines de siglo, en 1881, Emma Artayeta Hurtado,<sup>3654</sup> mujer de Mariano Vásquez, litigó con su hermana Julia acerca del patronato de la capellanía fundada en 1789 por el Dr. José Mariano Jaunzaras y Escobar.<sup>3655</sup> Este desalmado pleito

fué un triste incidente de los autos testamentarios seguidos para esclarecer el derecho de patronato que se litigaba entre las señoras de Escobar Arzac y la de Artayeta.<sup>3656</sup>

Cuando en la elección de los Patronos de las capellanías laicales debían aplicarse las leyes del Mayorazgo, determinando el grado, la línea y el sexo del eventual sucesor del mismo, las discusiones se volvían aún más agrias. En Buenos Aires, en un litigio por cinco capellanías legas fundadas en 1773 por Domingo Basavilbaso,<sup>3657</sup> por valor de \$11.200, entre sus nietos José Ramón de Basavilbaso y Justa Ramona de Basavilbaso, mujer de Miguel de Azcuénaga, el Juez en Primera Instancia Dr. Bartolomé Cueto declaró el Patronato en favor del bisnieto José Miguel de Azcuénaga, hijo de Doña Justa. Pero el Dr. J. Marcos Dongo, abogado de José Ramón, sostuvo en 1824, en la apelación contra la sentencia de primera instancia, fundado en las doctrinas de Rojas de Almansa (1755),<sup>3658</sup> y Molina (1592,1622),<sup>3659</sup> que dicha sentencia destruía el vínculo de agnación,<sup>3660</sup> y confundía la verdadera agnación establecida en la primer parte del llamamiento del fundador con la sucesión regular o cognación,<sup>3661</sup> establecida en la segunda parte del mismo. El vínculo agnaticio excluía

"...según las leyes vigentes, a toda hembra y sus descendientes de la sucesión,...porque la agnación se considera perpetua por derecho, y como la hembra no solo es el fin de ella, sino que por su medio la convierte en cognación, de ay es su justa exclusión y la de sus descendientes, porque el causado, no puede tener más virtud que el causante".<sup>3662</sup>

A su vez el Dr. Bernardo Vélez, abogado de Miguel de Azcuénaga, sostuvo, fundado en De Roza, Mieres (1533), Rojón, Pitón, el Cardenal de Luca (1684), Ciriaco, Covarrubias (1568,1574), Valenzuela (1607), Vela, Mascardi (1637), Graciano, Castillo de Bovadilla (1597,1649) y Rodríguez de Alvarado (1578), que en el Patronato de la misma "...si se ha de entender conforme al derecho...y al modo ordenatorio de suceder en los mayorazgos...a falta de varón suceden las hembras",<sup>3663</sup> y que por lo tanto

"...es necesario considerar estos segundos llamamientos en sentido compuesto con los primeros, porque todos se hallan en una misma cláusula, y mucho más porque en aquellos se hacen referencias a estos",<sup>3664</sup>

por lo que su mujer Doña Justa Ramona Basavilbaso y Garfías debió suceder a su padre Don Manuel Basavilbaso. En la capellanía fundada por José y Constanza González Cabezas, a nombre de su padre natural Domingo González Cabezas,<sup>3665</sup> el Pbro. Juan Tomás Rodríguez, aseveraba en 1784 ser hijo de Pedro Alcántara Rodríguez,<sup>3666</sup> un bisnieto de Cabezas, en cuyo caso era "...incontrovertible su preferencia a la pía memoria por deberse observar en esta sucesión el orden de los mayorazgos".<sup>3667</sup> También Don Ambrosio del Casal y Sanabria, hijo de Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y Sanabria,<sup>3668</sup> compareció en 1795 ante el Alcalde de segundo voto y dijo que conforme al testamento instituido por Ana del Casal y Sanabria,<sup>3669</sup> a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su pariente el Deán de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,<sup>3670</sup> para que fundara dos capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los seculares-- de dos mil pesos de principal cada una.<sup>3671</sup> Fundadas ambas capellanías en 1768, sobre las casas antigua y nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados a éstas lo fueron en el primer caso los hijos y descendientes de sus legítimos hermanos Pedro y José del Casal y Sanabria,<sup>3672</sup> vecinos del Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por su falta a los hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña Ana [Domínguez] Rabanal y Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los hijos y descendientes legítimos de las líneas de mis primas hermanas Doña Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa Rivarola y Don Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entendiéndose primero los de la línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".<sup>3673</sup>

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su Patronato

"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor fuere mujer, pase al varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea se conserve dicho Patronato con la preferencia del varón a la mujer".<sup>3674</sup>

Un cuarto de siglo más tarde, en 1819, el Pbro. Juan Antonio Zamudio,<sup>3675</sup> alegó contra Doña Juana Josefa de Echeverría y Ordóñez, viuda de Juan Estanislado de Zamudio,<sup>3676</sup> y su noveno hijo legítimo el Sargento Mayor Floro Zamudio, que el derecho al goce y pertenencia del patronato y capellanía de la buena memoria que había mandado fundar en 1772 su bisabuela Doña María de Arroyo y Ponce de León, viuda de Luis Antonio Home de Pessoa,<sup>3677</sup> le pertenecían a él como hijo legítimo de Ambrosio Zamudio, por ser "...su pariente más cercano en sangre y único sacerdote que hay en la familia".<sup>3678</sup> Juan Antonio Zamudio demostró con prueba irrefragable ser hijo legítimo de Ambrosio Zamudio, hermano este legítimo de Juan Gregorio de Zamudio, generante de Don Estanislado, marido y padre de los contendores; y que Juan Gregorio y Ambrosio fueron hijos legítimos del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio y de María Josefa Home de Pessoa, hija esta a su vez de la fundadora María de Arroyo. Por la duodécima cláusula de su testamento, María de Arroyo ordenaba a su hija Catalina Home de Pessoa, que del remanente del quinto se impusiere una capellanía.

#### **D-IV La Sucesión de los Beneficios**

El orden de preferencia en la sucesión de los patronatos recaía por lo general en los varones (patrilinealidad), por cuanto las mujeres poseían el privilegio de ser las beneficiarias --al momento del matrimonio o el ingreso a un convento-- de las llamadas cartas dotales. De cualquier modo se dieron numerosos casos en que la primogenitura de las capellanías recayera en mujeres (matrilinealidad). Según González Ruiz, podía darse el caso que en los llamamientos se ordenara alternar en el goce de una capellanía a diferentes líneas de una misma familia.<sup>3679</sup> La capellanía fundada en 1827 por Elena de Oro y Cossio Terán,<sup>3680</sup> viuda de Juan Vázquez, de \$800 pesos corrientes, era para que sirvieran de congrua alimenticia o sustentación de su sobrino el Dr. Bernardo José de la Colina y Oro,<sup>3681</sup> pero para el caso de su fallecimiento ordenó que recayera el Patronato de la misma, así como los réditos, es decir la capellanía, en las seis hijas mujeres del matrimonio de Manuel Vicente de la Colina y su hermana Isabel de Oro, por el orden de su nacimiento y mayor edad,

"...y en defecto de estas pasará el Patronato a los descendientes dellas siendo siempre preferidas las mujeres a los varones a no ser que estos sean clérigos ordenados in sacris y en defecto de toda esta familia pasará en iguales términos a los descendientes de mis hermanos Miguel y Diego de Oro".<sup>3682</sup>

En la capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por el Alférez de Dragones Tomás Alonso,<sup>3683</sup> su sobrina política María Josefa Sosa y Marín declaró en 1823 que por la cláusula sexta del testamento debía entenderse que entrarán al goce del patronato

"...las hijas mujeres de la referida Doña Zandalia [Dorna], como sobrinas políticas de la mujer del testador Da. Francisca Marín y en defecto desta todos los parientes más inmediatos de dicha Sra. prefiriendo siempre las mujeres a los varones".<sup>3684</sup>

De manera tal que debía entenderse

"...que el primer Patrono de la expresada capellanía debe ser y es la otorgante Doña María Josefa Sosa y Marín, que a esta ha de seguir Da. María Cirila Sosa y Marín: por falta desta recaerá en Da. Zandalia Dorna Sosa y Marín, por defecto desta en Da. Juana Gualberta Sosa y Casado".<sup>3685</sup>

En el dictamen acerca del Patronato de la Capellanía fundada por Juan Agustín Cueli, el Fiscal aclaraba en 1853 que el Fundador de la Capellanía no había expresado, en la cláusula institutiva de ella, "... si el descendiente llamado a su goce debe serlo de línea masculina o femenina".<sup>3686</sup> El Pbro. Cayetano Cires y Cueli agregaba que dicha cláusula "...llama promiscuamente a unos y otros sin ninguna distinción a este respecto".<sup>3687</sup> Pero la parte contraria insistía que Cires "...no era pariente más cercano por la línea de Cueli, que es la de varón".<sup>3688</sup> Pero según Cires, este era un craso error, "...por que en la línea de Cueli entran todos sus descendientes sean varones o hembras, y los hijos de estas, como descendientes de Cueli, forman con los hijos de varones una misma línea".<sup>3689</sup> Cires sostenía que la cláusula testamentaria de su abuelo, institutiva de dicha capellanía, llamaba al goce de ella a cualquiera de sus hijos que se dedicase a la Iglesia "...siguiéndose según sus edades y en defecto de estos a los parientes más cercanos por la línea de Cueli".<sup>3690</sup> Angustiado por el cuestionamiento de la parte contraria, Cires llegó a preguntarse

"...¿soy yo excluido del llamamiento general que hace dicha cláusula a sus hijos y descendientes? Claro es que no; que soy incluso en ella. Es así que solo lo son los consanguíneos o procedentes por la línea de Cueli; luego yo pertenezco a dicha línea, y procedo de ella, siendo nada menos que nieto de Juan Agustín Cueli fundador, segunda rama de esta raíz, y tronco común, y un punto segundo de la línea que nace de Cueli, y se llama de Cueli".<sup>3691</sup>

En otros casos no se hacía lugar al sexo, ni a la generación, ni a su derivación, y se nombraba en cambio a personas específicas previamente señaladas en el testamento. Ello daba lugar a la discusión acerca de si había o no líneas sucesorias que respetar. En la capellanía fundada en 1772 por Doña María de Arroyo y Ponce de León, viuda de Luis Antonio Home de Pessoa, la hija y albacea Catalina Home Pessoa nombró por patrono de la misma en primer lugar a su misma persona, sin hacer lugar a "...su generación, ni derivación", por cuanto por su fallecimiento llama en segundo lugar a su segundo albacea, que lo fue Juan Gregorio Zamudio.<sup>3692</sup> De igual forma, sin que tenga derecho alguno la legítima descendencia de Juan Gregorio, manda que muerto éste, pase el patronato a su tercer nieto y albacea, cual lo fue el Dr. Pedro Zamudio. Por cuanto la fundadora "...no designa generaciones, sino llama expresamente a personas señaladas", razón por la cual, para el Dr. Miguel García de la Huerta,<sup>3693</sup> en su alegato fechado en 1816, "...no hay ni puede haber líneas y mucho menos posesorias y privilegiadas".<sup>3694</sup> En la capellanía fundada en 1793 por el Dr. Diego Estanislao de Zavaleta e Indá,<sup>3695</sup> se designó por primer Patrono a su hermana María Josefa de Zavaleta, por segundo Patrono a su hermano

Clemente Zavaleta, y por terceros a los legítimos descendientes de su prima hermana carnal María Magdalena de Solá e Indá, mujer de Ramón de Anchoris.<sup>3696</sup> Pero un siglo después, en 1870, Victoria Gutiérrez Zavaleta,<sup>3697</sup> suscitó un litigio por el orden de descendencia de dicho patronato con el Dr. Benajmín Zavaleta, hijo de Clemente Zavaleta, recayendo el fallo del Juez Dr. Casares en favor de este último.<sup>3698</sup>

Cuando un fundador de capellanía laical elegía para la sucesión de la misma a una línea sucesoria específica, esta debía agotarse o extinguirse antes de pasar su sucesión a otra línea. En la capellanía mandada fundar en Córdoba, en 1736, por Francisco Gerónimo de la Fuente,<sup>3699</sup> su fundador estableció que los descendientes de sus tías maternas Manuela y Antonia Luján de Medina solo habrían de entrar al beneficio "...en caso de que la descendencia de la dicha mi hermana [Josefa de la Fuente] se acaue del todo, de suerte que no quede barón ni hembra de ella".<sup>3700</sup> De igual forma, en la capellanía mandada fundar en Mendoza en 1738 por el General Manuel Zapata de Mayorga,<sup>3701</sup> y cuestionada por Juan Manuel Paiva,<sup>3702</sup> el bisnieto del primero, Pbro. José Lorenzo Güiráldez y Zapata,<sup>3703</sup> alegaba que

"...de nada le sirve a Paiva que sus hijos estén en el mismo grado que yo estoy porque el instrumento de fundación no llama a los descendientes de Don Ramón [Zapata] y no pueden entrar estos a gozar de la capellanía y patronatos mientras exista un solo descendiente de Don Ignacio [Zapata], aunque este estuviese en el último grado de parentesco de su línea y aquellos en el primero de la suia".<sup>3704</sup>

La exclusión sufrida por Paiva y los descendientes de Don Ramón, no debía --según lo expresaba Güiráldez-- formar agravio porque a Manuel Zapata y Cecilia Pintos, como fundadores, les correspondía

"...escoger la línea que quisieren para las sucesiones del beneficio eligiendo si hubiesen querido la línea de mujer sin agravio de la de los varones, como también pudieran haber dexado determinado las de los extraños sin quexa ni derecho alguno de los propios hijos".<sup>3705</sup>

La conversión de una fundación capellánica de eclesiástica a laical afectaba el orden sucesorio de sus patronos y capellanes. Había quienes sostenían que producida dicha conversión las fundaciones entraban a regirse por la ley de los mayorazgos. En el pleito suscitado por la capellanía fundada por María Báez de Alpoin y Labayén, viuda del General Alonso de Arce y Arcos, a la decisión del Tribunal que adjudicó en 1833 los derechos del Patronato al nieto mayor Don Agustín Pinedo y Arce, y el goce de la capellanía al bisnieto Juan Pinedo, el Dr. Félix Ignacio Frías, apoderado del Dr. Estéban Agustín Gazcón, alegaba

"...¿no es cierto que una vez convertida en laical la fundación, las sucesiones han de reglarse por los Mayorazgos; que el primer llamado al goce de la fundación es el que hace cabeza y forma la línea actual y efectiva hasta el infinito: que no puede hacerse el tránsito de una línea a otra, sin quebrantar las leyes y cometer una injusticia horrible".<sup>3706</sup>

No es cierto, insistía Frías,

"...que el primer llamado por la fundadora el único que ha poseído y disfrutado la capellanía y a quien se le debe tener y clasificar por cabeza de la línea actual y

efectiva en el supuesto de laical ha sido Don Joaquín Mariano Valdés, hermano uterino de Gazcón, nieto de la fundadora, elegido y nombrado con preferencia y predilección a Don Agustín Pinedo, nieto igualmente que vivía entonces, que era de una edad o poco mayor que Don Joaquín que andaban juntos en la Escuela y estudios, pero que no le mereció igual cariño y preferencia a la abuela, o por que ya entonces manifestaba inclinaciones militares, o por otros principios?".<sup>3707</sup>

Porqué principio, o cual era la razón, se preguntaba entonces Frías, para privar a Gazcón del goce de la capellanía

"...arrancándola de la línea efectiva actual y trasladándola a otra diversa; postergando al más inmediato del último poseedor, mayor en edad, y con consideraciones no despreciables para trasladarla a otra línea distinta, no estando concluida la poseedora, y a otra persona mucho mas remota y distante, tanto de la fundadora, cuanto del último poseedor, como lo es Dn Juan Pinedo?".<sup>3708</sup>

Cuando el patrono era un clérigo secular, y por su fallecimiento se extinguía su línea sucesoria, el patronato solía pasar a un sobrino. En la capellanía fundada en Buenos Aires en 1732 por Eusebio Espinosa y María Martínez de Tirado,<sup>3709</sup> de su tronco común se derivaban dos líneas sucesorias, la de Francisco y la de Bernardo Espinosa, ambos hermanos.<sup>3710</sup> Según la cláusula quinta del testamento del último poseedor del patronato, Santiago Solano Espinosa, el primer patrono había sido Francisco Espinosa,<sup>3711</sup> y el segundo Bernardo Espinosa; y por falta de este último el patronato pasó al hijo del primero, el Pbro. Juan Antonio Espinosa Zapata, entrando después la línea sucesoria de Doña María Espinosa, hermana de aquellos, en el caso de no haber línea de varón. Pero en la cláusula sexta del mismo testamento se observa que el Pbro. Juan Antonio Espinosa, quien poseyó el patronato, no lo pudo transmitir a su línea sucesoria, "...pues como era presbítero no podía haber o suponersele descendencia para que hubiera seguido el goce o posesión en ella".<sup>3712</sup> De ahí entonces resultaba comprobado que el patronato tenía que pasar a la línea sucesoria preferida de Don Bernardo Espinosa; y como los hijos de éste eran el Pbro. Santiago Solano Espinosa y D. Baltasar Espinosa entró aquél en el goce de la capellanía. Extinguida también en él la línea sucesoria por ser presbítero, pasaba la herencia a Don Baltasar, y por su fallecimiento a sus hijos; de modo que siendo Don Máximo y Doña Hermenegilda Espinosa los únicos hijos, "...el goce no puede ser de otro sino de dicho D. Máximo".<sup>3713</sup>

En el método para asignar el orden de preferencia o prelación de los postulantes a capellanes que se presentaban en los concursos y litigios regían distintos criterios. Cuando el criterio que prevalecía era el del parentesco, regían las leyes del mayorazgo, a saber: a) la primogenitura, y b) la varonía. Para aclarar en sede eclesiástica las diversas sucesiones de los opositores a una capellanía, los Asesores y Fiscales Eclesiásticos estimaban conveniente, fundados en Castro (1765), entre otras medidas procesales: a) formar las genealogías; b) calificar las generaciones; y c) computar canónica o civilmente los grados de parentesco.<sup>3714</sup> Las genealogías debían formarse por "...estirpe, tronco, o padre común, en quien primeramente se unen los colaterales"; y el cómputo de los grados de parentesco debía practicarse sobre la base "...que tantos grados distan estos entre sí, quantos el más remoto dista del tronco y estirpe".<sup>3715</sup> No ya para alimentar vanidades, sino para justificar intereses muy concretos, diversos descendientes de fundadores de capellanías llegaron a dibujar frondosos árboles genealógicos de numerosas sucesiones para acreditar sus derechos a las mismas. En Córdoba, en 1791, los Dres. José Gabriel Echenique, Juan Gerónimo Moyano, Tadeo Salguero de Cabrera,<sup>3716</sup> y Leopoldo de Allende y Moyano,

litigaron entre sí por la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera,<sup>3717</sup> viuda de Miguel de Ardiles, llegando a dibujar en el expediente tres árboles de ocho sucesiones para probar sus respectivas conexiones con el fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.<sup>3718</sup> En el litigio celebrado a instancias de los descendientes de Catalina Arrascaeta, por los derechos a la capellanía mandada fundar en 1763 por Pedro de Salas se llegó a dibujar en el expediente un árbol de diez sucesiones para probar su conexión con el fundador.<sup>3719</sup> Asimismo, en Córdoba, en 1774, los primos Pbro. Pedro Patricio Bazán y Pedraza,<sup>3720</sup> y Juan Ignacio Rodríguez; y los Maestros José Tablado y Otáñez Bazán, y Luis Dávila Gutiérrez,<sup>3721</sup> litigaron entre sí por la capellanía fundada en 1746 por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos.<sup>3722</sup>

En Buenos Aires, en 1781, el R.P. Felipe Reynal,<sup>3723</sup> reclamó que la capellanía fundada cuarenta años atrás, en 1742, por su bisabuelo Andrés Dávila,<sup>3724</sup> le fuera otorgada a él, en razón de llenar las condición de heredero.<sup>3725</sup> Cuatro años después, en 1785, disputaron cuatro capellanías fundadas por Domingo González Cabezas, su nieto Julián Clemente Rodríguez,<sup>3726</sup> que era el patrono de las capellanías, y el sobrino carnal de este último el Pbro. Juan Tomás Rodríguez,<sup>3727</sup> dirimiéndose por un auto de enero de 1786 en que el Deán y el Cabildo Eclesiástico en sede vacante, como juez originario, adjudicó dos capellanías de a mil pesos cada una a Julián y otras dos que componían \$2.095 de principal a su sobrino Juan Tomás.<sup>3728</sup> Siete años después, en 1793, Julián cedió y renunció en su sobrino dichas dos capellanías, quedando reunidos en éste el principal de cuatro capellanías, equivalente a \$4.095.<sup>3729</sup> Otros quince años después, en 1809, Luis Antonio de Lahitte, marido de María Toribia de Elía,<sup>3730</sup> siguió una instancia en la Curia Eclesiástica contra su cuñado Manuel José de Elía solicitando se declarase en favor de su hijo Juan José de Lahitte, el derecho al goce de una capellanía fundada por su tío abuelo político el Regidor Perpetuo Juan de Benito y González.<sup>3731</sup> El Dr. Agustín Pío de Elía había sido el primer poseedor de la capellanía, merced a cuyos réditos había podido estudiar en la Universidad de Córdoba, habiendo pasado luego a su hermano Angel Mariano, quien también había estudiado en Córdoba, y de éste a sus otros hermanos Pedro José y José María, este último marido de Genara Warnes, viuda de su hermano mayor,<sup>3732</sup> y finalmente de estos a su hermano menor Manuel José de Elía.<sup>3733</sup> Y en 1821, a mérito del Auto del Juzgado se le otorgó el Patronato de una Capellanía laical, fundada en 1783 por el Dr. Juan Baltasar Maciel, albacea y fideicomisario de Doña María Josefa Basurco y Herrera,<sup>3734</sup> primero a Fabían Aldao,<sup>3735</sup> el cual la disfrutó hasta su fallecimiento, sucediéndole Don Matías, mayor entre los restantes hermanos,

"...premuertos ya Don Agustín y Don Francisco Antonio que le precedían, como Don Mariano, quien se halla establecido en el Reino de España, adonde pasó después de haber abdicado los derechos que aquí le podían corresponder".<sup>3736</sup>

Muerto Don Matías en Agosto de 1820, le sobrevino Don Luis José Aldao, el sexto de los hermanos varones. En San Juan, Francisco Fernández de Maradona,<sup>3737</sup> y José Ortiz de Santibáñez solicitaron en 1782 para sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Angel Ortiz la capellanía de Santa Bárbara,<sup>3738</sup> vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias y Jofré, alegando ser sus hijos respectivamente sobrino y sobrino nieto de los instituyentes de la capellanía.<sup>3739</sup> La misma capellanía fué solicitada más luego por Don Pedro Toranzos y Montenegro para su nieto Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P., alegando el mismo argumento.<sup>3740</sup> Y los Pbro. José Domingo Videla,<sup>3741</sup> Miguel Sánchez, Juan Gualberto Echegaray,<sup>3742</sup> y Pedro Pascasio Albarracín,<sup>3743</sup> y Fr. Remigio Albarracín,<sup>3744</sup> litigaron entre sí en 1793 por la capellanía de

Santa Lucía, también ubicada en San Juan, fundada por su tía y tía abuela, respectivamente, María Antonia Irrazábal,<sup>3745</sup> viuda de Francisco Alfonso Pereyra.<sup>3746</sup> En Salta, en la fundación que impuso en 1769 por cláusula testamentaria Pedro Díaz de Loria, como albacea de Hernando Hervas, sobre la estancia y potreros de la Alemania, litigaron entre sí el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y Don Manuel Fernando Aramburú.<sup>3747</sup>

Y en la fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso en Salta a favor de su medio hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban de la Silleta e Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,<sup>3748</sup> litigaron entre sí a comienzos del siglo XIX el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de Rosario de Lerma, Pbro. Isidro Fernández.<sup>3749</sup> En Santa Fé, en la capellanía impuesta en 1808 por Juan Bautista Iguen a favor de Pedro José Crespo, sus titulares debieron litigar con Agustín de Yriondo por los réditos de la misma.<sup>3750</sup> Y en el Alto Perú, y luego en la Real Audiencia de Lima, se siguió en 1780 un dilatado pleito entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que por \$26.000 fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.<sup>3751</sup> El Patronato de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.<sup>3752</sup> De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.<sup>3753</sup>

En conclusión, del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellánico, se transmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia de la modernidad absolutista; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsión practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el sexo primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

## Capítulo II-B-6      **Conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial.**

### Índice

- E-I Tradición historiográfica en materia de conflictos clero-estado
- E-II Sistema de frenos y contrapesos.
- E-III Control secular de funciones religiosas.
- E-IV Cuestiones de ceremonia y protocolo.
- E-V Principales fuentes de conflicto.
- E-VI Noción de orden público en materia religiosa
- E-VII Mecanismos canónicos para contrabalancear el poder de la sociedad política
- E-VIII Administración de sacramentos

### **Introducción del capítulo II-B-6**

A los efectos de sortear el punto muerto en que ha caído la discusión acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial es que creemos que más allá de la discusión metafísica acerca de los orígenes del Patronato Real y del fuero eclesiástico, es preciso investigar el contenido mismo de los conflictos y antagonismos entre ambas instituciones (Fuero y Patronato), y su impacto en la estructura social colonial y en el proceso emancipador.<sup>3754</sup>

Amén de la facultad de transferir el poder de confirmar o revocar elecciones concejiles, designar Villas Reales y capitales de provincia y virreinato, así como autoridades civiles y militares, otorgar licencias, administrar bienes de Temporalidades, recaudar impuestos y producir levas, a los Virreyes les cabía también el derecho de ejercer y transferir las facultades del Vice-Patronato Real, entre las cuales se destacaban los actos de administración o jurisdicción,<sup>3755</sup> y los actos de honor o representación.<sup>3756</sup> La subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes o de los Virreyes a las Reales Audiencias, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones entre la Iglesia y el estado. Esta subrogación o transferencia ofendía tanto a las autoridades eclesiásticas como a las profanas. A los Virreyes, por cuanto entendían que era impropio ceder a los Gobernadores-Intendentes facultades que les eran indelegables. A los Obispos, por cuánto estos últimos consideraban menoscabador que los Virreyes designaran a los Curas Párrocos, y estimaban inferior a su dignidad tener que tratar con Gobernadores-Intendentes. A los Gobernadores, por cuanto algunos de estos últimos conceptuaban contrario a su jerarquía tener que ceder a los Tenientes Asesores Letrados sus prerrogativas. Y ofendía a los Curas Párrocos, por cuanto estos últimos consideraban también por debajo de su autoridad tener que tratar con cabildantes.<sup>3757</sup>

En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por algunas autoridades en el ejercicio del Patronato Real. En el sentido apuntado por las tesis de TePaske (1970) y Mora Mérida (1983), cabe preguntarse si los conflictos en el seno de la Iglesia, y entre ésta y el Estado, por la provisión de curatos, beneficios y canonjías,<sup>3758</sup> y el usufructo del fuero eclesiástico, se hallaban o no relacionados con los procesos de

estamentalización, clericalización y criollización de la sociedad colonial. Los conflictos entre la Iglesia y el Estado se manifestaban en las luchas por los ascensos, los destinos, y las capellanías y censos, las cuales reflejaban las contradicciones por la participación en la renta eclesiástica. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las burocracias eclesiásticas locales. En las contradicciones entre la Iglesia y el Estado colonial, estudiaremos en este trabajo los casos en que el fuero eclesiástico, y con él el clericalismo, afectaron la autonomía de los Cabildos seculares; los casos en que los Cabildos Eclesiásticos se enfrentaron a los episcopados respectivos, y los casos en que la composición étnica de las Ordenes Religiosas influyó en la actitud de los cabildos seculares, como fueron los casos de Córdoba y San Juan. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Para ello nos hemos limitado a investigar el rol jugado por los estamentos en la actividad eclesiástica. La incidencia de los conflictos entre el fuero eclesiástico y los derechos del Patronato Real en la estamentalización de la sociedad colonial, variaba según que involucraren al clero regular o al secular, y según se manifestaren en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción, o en los actos de honor o representación. El derecho al fuero eclesiástico, contó como un verdadero privilegio personal, que alcanzaba a las autoridades de los sub-ordenes, tales como los Cabildos Eclesiásticos, los Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, las Cofradías y las Universidades.<sup>3759</sup> A menos que las causas civiles fueren de lesa majestad, las autoridades civiles no podían intervenir en contra de dichas autoridades.<sup>3760</sup> Al liberar a los miembros del clero y sus sub-ordenes de las persecuciones de los Alcaldes Ordinarios y los oficiales de Real Hacienda, y atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y la integridad del comercio, el fuero eclesiástico influía en el comportamiento de los vecindarios y de los mercados de mercancías.<sup>3761</sup> En este último caso, afectaba causalmente las relaciones inter-estamentales e implicaba verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.<sup>3762</sup> Por ejemplo, el fuero eclesiástico, al igual que el fuero capitular, privaba al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar créditos. Asimismo, el fuero eclesiástico habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos;<sup>3763</sup> y b) privado al mercado de mercancías de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos.

## **E-I Tradición historiográfica en materia de conflictos clero-estado**

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial no han sido convenientemente estudiadas hasta el presente, habiendo la mayoría de los estudios reduciéndose a analizar la naturaleza del origen del Patronato Real y del Vice-Patronato Indiano,<sup>3764</sup> en lugar de estudiar la naturaleza de los conflictos que se suscitaron entre ambas instituciones claves del pasado colonial. Por un lado, la historiografía liberal, influenciada por las teorías galicanas o regalistas,<sup>3765</sup> sostenía que el Patronato o Vicariato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza laica o profana, inherente a la soberanía temporal, y por lo tanto no subrogable por el fuero eclesiástico.<sup>3766</sup> Por otro lado, la historiografía católica, adversaria del regalismo o galicanismo y partidaria de la independencia de la Iglesia y el Estado, sostenía que el Patronato y el Vice-Patronato eran

en su origen de naturaleza sacra o espiritual, por estar fundados en una gracia (concesión o transferencia) pontifical, la cual era rescindible pero intransferible o no subrogable.<sup>3767</sup>

Por último, la historiografía positivista, argumentó que no obstante el Patronato y el Vice-Patronato y las teorías regalistas, el Clero operó como intelectual orgánico de las clases más tradicionales, en un principio para predicar la sumisión al poder divino, y luego con las Reformas Borbónicas para predicar la sumisión a la Corona de España, impidiendo así el desarrollo de una burguesía nacional en América.<sup>3768</sup> Últimamente, Guerra (1989,1990) sostuvo la necesidad de analizar en las sociedades de la modernidad absolutista no las estructuras sino la conducta de los actores sociales y políticos.<sup>3769</sup> En el estudio de dichas conductas y en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la revolución de independencia, las políticas centralizadoras y secularizadoras Borbónicas (expulsión de los Jesuitas) habrían logrado inconscientemente que los patriciados locales, representados por sus Cabildos seculares y eclesiásticos, sus Capítulos de religiosos, y sus Comandantes de Armas intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos y Oidores. Para Lavallé (1978), el antagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Órdenes Religiosas alimentó el nacimiento de la conciencia criolla.

En materia de fuero eclesiástico, Levaggi (1971) sostuvo que mientras el fuero fue en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.<sup>3770</sup> Autores positivistas como García (1900) insistieron en el nocivo efecto que las corporaciones y los fueros provocaban en la sociedad civil. Pero para autores como Levaggi (1971,1977), durante la dominación Borbónica, las Reformas alcanzaron --mediante instrumentos jurídicos como los Recursos de fuerza y los derechos de presentación--<sup>3771</sup> a modificar la preeminencia social engendrada por dichos fueros. Asimismo, con dichas Reformas el clero vió seriamente reducida su inmunidad personal.<sup>3772</sup> Para Rivarola (1934), sólo los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. Levaggi (1971), en tanto, sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros, asilos o inmunidades consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) habían sido de un acentuado carácter real.<sup>3773</sup>

## **E-II El sistema de frenos y contrapesos.**

La administración colonial de la iglesia se volvió no tanto una cuestión de comando vertical del rey, el papa, o el arzobispo, sino como un sistema de frenos y contrapesos de las instituciones burocráticas autogobernadas. Cuanto más tiempo el funcionario eclesiástico permanecía en su cargo, más obvias se volvían las tendencias contradictorias de la Iglesia. Cuando el equilibrio de poder era alterado, estallaba un conflicto. Este conflicto era estimulado por la naturaleza contradictoria de la iglesia colonial, porque comprendía una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas (el papa, el rey, y el arzobispo), una división heterogénea del poder eclesiástico (ejecutivo, legislativo y judicial), una relación inconsistente con el estado colonial, una circulación ambivalente de una burocracia eclesiástica (la forzosa alternativa de los cargos más importantes en una provincia, entre frailes criollos y españoles), y una distribución contradictoria de los derechos de protocolo o ceremonial.<sup>3774</sup>

A pesar de las políticas regalistas, la iglesia diocesana retenía el control sobre un número de importantes funciones que hipotéticamente pertenecían a la "sociedad civil": los registros de población, las actividades civiles, la administración de justicia, la caridad, las capellanías y, último en el orden pero no en su importancia, la sanción de cambios de estado civil (matrimonio), que se convirtió en la fuente de varios conflictos.<sup>3775</sup> La educación fue delegada formalmente por el obispo a principios de la década de 1620 al colegio jesuita.<sup>3776</sup> Además, algunos eclesiásticos se comportaban como intelectuales tradicionales, vinculados orgánicamente con los intereses orientados hacia el mercado interno, que expresaban una ideología neo-feudal y obstaculizaban el crecimiento de una burguesía orientada hacia el mercado externo. A despecho de la afirmación de Ingenieros y de Rojas, la iglesia católica en Buenos Aires apenas pudo monopolizar la ideología o controlar la importación y circulación de libros,<sup>3777</sup> debido al extendido contrabando que se encontraba en el corazón de la economía porteña.<sup>3778</sup>

Mas aun, a pesar de las políticas regalistas expresadas a través de la legislación real concerniente al patronato, la Iglesia nunca perdió su autonomía institucional. La mayoría de las normas para la Iglesia Rioplatense fueron provistas por el derecho canónico y el Concilio de Trento. La Iglesia en el virreinato Peruano, al cual la diócesis del Río de la Plata pertenecía, sin embargo, también decretó su propia legislación.<sup>3779</sup> El primer Concilio de Lima celebrado en 1552 contenía cuarenta constituciones relacionadas con los indígenas. La preocupación por la vida de los indios continuaron en ambos el segundo y el tercer Concilio de Lima celebrados en 1567 y 1583 --el primero convocado por el Arzobispo Loaiza y el segundo y el tercero por Santo Toribio de Mogrovejo.<sup>3780</sup> Esta legislación conciliar, sin embargo, no excluía la elaboración de normas diocesanas. La diócesis del Río de la Plata decretó también su propia legislación. El sínodo de 1603 reflejaba en su carácter una copia casi exacta del primer sínodo celebrado en Tucumán en 1597, consistente principalmente en la explicitación de los decretos del Tercer Concilio de Lima.<sup>3781</sup> De aquí que, la razón por la cual la autonomía institucional de la Iglesia Católica en América Latina era extremadamente relativa se debía principalmente al poder de decretar su propia legislación.

A diferencia de las sedes virreinales donde la iglesia mantenía una independencia bastante fuerte de las autoridades civiles, en las regiones periféricas, como la provincia de Tucumán donde la burocracia estatal y la sociedad civil eran más débiles, cada vez que la iglesia convocaba concilios eclesiásticos, los gobernadores (representando a la sociedad civil) eran habitualmente invitados a participar.<sup>3782</sup> En la presencia que el gobernador hacía en los sínodos eclesiásticos, uno puede encontrar la razón del porqué las ordenanzas de los Gobernadores y lo producido en los sínodos se asemejaban entre sí. El sínodo del Río de la Plata de 1603 era a las Ordenanzas de Ramírez de Velazco lo que el Tercer Concilio de Lima fue para las Ordenanzas del Virrey Toledo. La complementariedad de ambas la legislación secular y eclesiástica era casi completa. El sínodo de 1603 contenía tres partes: la primer parte lidiaba con el adoctrinamiento de los indios, la segunda parte concernía a la administración de los sacramentos, y la tercera parte con los ayunos y fiestas. El sínodo estuvo hondamente preocupado con las cuestiones de los indios y el sacramento del matrimonio. Especificaba la necesidad de enseñar la doctrina en la lengua Guaraní, la obligación del encomendero de pagar al cura un peso por cada indio adoctrinado, y del residente no-encomendero a pagar medio peso.<sup>3783</sup> Más luego, en 1629, un nuevo Sínodo fue celebrado en Charcas convocado por el Arzobispo Fernando Arias de Ugarte. Este particular sínodo resultó en cinco libros distribuido en 140 decretos. El primer libro lidió con el adoctrinamiento de los indios; el segundo con rituales tales como el ayuno y las

fiestas; el tercero y cuarto con la burocracia eclesiástica consistente en las hermandades, los capítulos eclesiásticos, los curas regulares, seminarios, visitadores, y examinadores; y el quinto libro lidió con los crímenes tales como la idolatría, la brujería, la blasfemia y la usura.<sup>3784</sup>

### **E-III El control secular de funciones religiosas.**

Debido al así llamado Patronato Real, los funcionarios civiles también retenían, el control de un número de funciones religiosas cruciales que se volverían también la fuente de numerosos conflictos. Por ejemplo, la sociedad política (gobernadores y cabildos) era responsable de erigir iglesias, capillas, y hospitales, de autorizar el establecimiento de órdenes religiosas y la celebración de concilios provinciales, de expulsar a sacerdotes escandalosos, de recaudar los diezmos, de disponer de los espolios del obispo y de seleccionar santos particulares como patrones religiosos (los mediadores entre el pueblo y dios).<sup>3785</sup> Asimismo, los residentes laicos también retenían el control de los cargos eclesiásticos, como el notario del Santo Oficio (Inquisición) o los funcionarios de la Santa Cruzada. Los principales funcionarios del Tribunal de la Santa Cruzada consistieron en el subdelegado, el oidor mas antiguo de la Audiencia de Charcas, y un fiscal civil o asesor, quién era también el Tesorero, que retenía el control monopolístico de la venta de las Bulas de composición.<sup>3786</sup>

Aquellos pobladores civiles que adquirirían oficios eclesiásticos aceptaban su acceso a los privilegios eclesiásticos. Este proceso de secularización de los oficios eclesiásticos de Buenos Aires también llevó a un creciente uso de los fueros eclesiásticos (inmunidades legales). El derecho al fuero era un privilegio consistente en una inmunidad con respecto al poder y la jurisdicción del fuero secular.<sup>3787</sup> Tan temprano como en 1627, Juan de Vergara, notario del Santo Oficio y Tesorero de la Santa Cruzada, cuando fue arrestado por el Gobernador Céspedes, buscó asilo en los fueros eclesiásticos.<sup>3788</sup> Más luego, en 1649, el Gobernador Laríz impuso un edicto ordenando que a partir de entonces "los curas no deben ser admitidos en el Fuero Real (jurisdicción secular), ni por jueces ni por Cabildos; debiendo librar, en caso de tener que intervenir en juicios, poderes a vecinos laicos sujetos al fuero real, y de ocurrir lo contrario correr el riesgo que el gobernador los declare nulos."<sup>3789</sup>

Las normas para el gobierno hispano-americano colonial estaban provistas por la legislación real (las Partidas, Leyes de Toro, Fuero Real, Fuero Juzgo, cédulas reales, pragmáticas, provisiones, y asientos). El gobierno en el virreinato Peruano, sin embargo, al cual pertenecía el Río de la Plata, decretó su propia legislación. Las Ordenanzas del Virrey Toledo de 1574 fueron los primeros exponentes de la legislación Hispano-Americana.<sup>3790</sup> Igualmente, en la jurisdicción del Río de la Plata, a la cual Buenos Aires pertenecía, también decretó sus propias leyes tomándolas prestado de las Ordenanzas de Toledo. Las Ordenanzas de Ramírez de Velazco en 1597, las de Hernandarias en 1603, y las de Alfaro en 1612, fueron las primeras muestras de una legislación Rioplatense.

Las Ordenanzas de los Gobernadores Ramírez de Velazco y Hernandarias prescribían los deberes de los encomenderos para construir iglesias en cada pueblo de indios; para comprar vestimenta sagrada, cera y vino, y dar la misa; emplazar una cruz alta a la entrada de cada pueblo de indios; para tener especial cuidado que sus indios tengan confesión al menos una vez al año, para ir a misa al menos cada quince días, y para ofrecer rezos cada noche; darles a sus indios adoctrinamiento, pagar al cura el estipendio

estipulado por el Obispo; y no hacer trabajar a sus indios en días sábados, domingos o durante las fiestas religiosas.<sup>3791</sup> Más aún, estas Ordenanzas eran para los sínodos eclesiásticos lo que las Ordenanzas del Virrey Toledo lo fueron para los Concilios de Lima. El refuerzo y solapamiento mutuo de ambas legislaciones secular y eclesiástica fue asombroso.

Sin embargo, a pesar de la complementariedad legislativa y del Patronato Real, los obispos y gobernadores no se comportaban, en una forma homogénea. Las leyes originales sobre la deportación de eclesiásticos de las Indias fueron promulgadas por primera vez con el ostensible propósito de proteger a los colonos y a los indios de los abusos que traían consigo los sacerdotes.<sup>3792</sup> Ya en 1589, el Cabildo de Buenos Aires expulsó a Francisco Romano, un clérigo Franciscano, sobre la base de que había dado un mal ejemplo.<sup>3793</sup> Esta represalia, sin embargo, pronto devino una de las herramientas mas importantes de la sociedad civil. Por ejemplo, en 1590, el Cabildo expulsó al Obispo Alonso Guerra fundado en sus excesivas demandas con respecto a la recaudación del diezmo.<sup>3794</sup>

Mientras los sacerdotes, en coalición con los corregidores, podían engañar a los indios a través de la extracción de toda suerte de diezmos eclesiásticos fraudulentos, no podían hacer lo mismo con la población blanca y mestiza. Penetrados también por lo que algunos historiadores Revisionistas atribuyeron a la influencia hebrea, los colonos de Buenos Aires, incluyendo los productores orientados hacia el mercado interno, soportaban un plan diocesano de cargas impositivas a la producción y a la propiedad. Ya en 1586, los vecinos y los Oficiales Reales se opusieron a que el Obispo Alonso Guerra impusiera el diezmo.<sup>3795</sup> En forma similar, en 1617 el Cabildo se opuso al cura vicario Francisco Caballero Bazán, originario del Paraguay, por tratar de imponer un impuesto anual denominado **doctrina**, que consistía en cuatro reales por cada esclavo poseído.<sup>3796</sup> Asimismo, el Cabildo se opuso a que la Iglesia gravara al poverío con excesivas limosnas para entierros durante la epidemia que golpeó a Buenos Aires en 1621.<sup>3797</sup> Dieciseis años mas tarde, en 1637, el Cabildo entero se opuso al nuevo Obispo Cristóbal de Aresti, del Paraguay, por tratar de decretar un tributo eclesiástico denominado **primicias** (primeros frutos) que habría gravado vacas, yeguas pollinos, lechones, y semillas.<sup>3798</sup>

#### **E-IV Cuestiones de ceremonia y protocolo.**

La sociedad política y la civil también luchaban a través de gobernadores y obispos sobre de cuestiones de ceremonia y protocolo. Los gobernadores luchaban por preservar los derechos acordados a ellos por el Patronato Real y para que se les reconociera su rol en la designación de los sacerdotes.<sup>3799</sup> En 1635, un conflicto surgió sobre la localización de un maderamen o enrejado dentro de la catedral. Cuando la catedral fue oficialmente fundada en 1620, durante el tiempo cuando el primer Obispo Fray Pedro de Carranza fue elegido, la reja formaba algo como una capilla cerca del altar mayor. Entre la reja y el altar anteriormente se sentaba el gobernador, representando al Rey y usando de las prerrogativas del Patronato Real. Desde que la reja fue removida y llevada al presbiterio, el gobernador y los funcionarios públicos restantes se entraron a sentar sin discriminación alguna del resto del vecindario. Estas circunstancias ofendieron las sensibilidades elitistas del Gobernador Pedro Estéban Dávila, que respondió boicoteando la misa celebrada en la catedral. Más aún, las autoridades seculares tomaron sus respectivas sillas y se mudaron a la Iglesia Franciscana.<sup>3800</sup> Dos años mas tarde, en 1637, el conflicto que estalló por los tributos eclesiásticos resultaron en la excomunión del Gobernador Mendo de la Cueva y Benavídez por el Obispo Cristóbal de Aresti.<sup>3801</sup> Para defender sus prerrogativas del Patronato Real

ahora amenazadas por la excomunión que --al disolver la obligación de vasallaje y obediencia-- debilitaba su poder para hacer cumplir la administración de justicia y llevar adelante las responsabilidades ejecutivas, el Gobernador Cueva y Benavídez amenazó con renunciar. Tres años más tarde, en 1640, el Obispo Aresti, ahora tomándose revancha de sus previos fracasos, desafió al Gobernador Cueva y Benavídez sobre la base de que estaba tratando de enlistar a los vecinos de Buenos Aires, contra su voluntad y a su propia costa, en expediciones militares que fueron principalmente usadas para cazar ganado salvaje.<sup>3802</sup>

Finalmente, la sociedad civil, a través de las autoridades eclesiásticas, estuvo en desacuerdo sobre políticas económicas desempeñadas por la sociedad política. Por ejemplo, en 1606, Cristóbal de Loyola, el Obispo del Río de la Plata (tanto del Paraguay como de Buenos Aires), discrepó con el Gobernador Hernandarias sobre la correcta interpretación de la Real Orden que prohibía el tráfico con Brasil. Loyola creía que las Ordenes Reales que no respetaban el bienestar del vecindario debían ser **obedecidas pero no cumplidas**. De aquí que Loyola dedujo que Hernandarias estaba obligado a revocar la Real Orden. Loyola consideraba que la prohibición del comercio era equivalente a la ruina de la nueva ciudad.<sup>3803</sup> Veinte años más tarde, en 1626, el Obispo Fray Pedro de Carranza, debido al encarcelamiento de Juan de Vergara --el líder Confederado y el mayor contrabandista y traficante de esclavos-- desafió al Gobernador Francisco de Céspedes.<sup>3804</sup>

Los desacuerdos de la iglesia colonial hispanoamericana también alcanzaron el área de las relaciones iglesia diocesana/clero regular. A pesar de la frecuencia formal de la legislación eclesiástica, los funcionarios seculares y eclesiásticos generalmente se encontraban en esta época bajo la influencia de una suerte de anticlericalismo erasmiano, la ideología orgánica de cualquier burguesía mercantil moderna. Esta sátira erasmiana estaba dirigida contra vicios y abusos clericales, y hasta incluía ataques subrepticios contra varias instituciones, ceremonias y rituales de la iglesia, no deteniéndose siquiera en el dogma mismo.<sup>3805</sup>

Otro reflejo de esta lucha interna era la política pública seguida por los gobernadores con respecto a la inmigración de sacerdotes extranjeros. Cuando las fuerzas orientadas hacia el mercado interno gobernaban Buenos Aires, la facción Benemérita intentaba impedir que la iglesia fuera invadida por sacerdotes españoles.<sup>3806</sup> El Gobernador Hernandarias le escribió al Rey en 1617 pidiéndole que ahorrara los gastos de enviar curas españoles, que el no estimaba, y tratara de imponer curas nativos, que había traído de Asunción del Paraguay.<sup>3807</sup>

## **E-V Las principales fuentes de conflicto.**

Las principales fuentes de conflicto entre el obispo y el capítulo catedralicio residían en el poder de establecer prebendas y de distribuir los ingresos de la iglesia.<sup>3808</sup> Estas dos fuentes principales de la controversia, como Schwaller (1981) detalló para el caso de México, tuvieron fuertes implicaciones para la balanza del poder entre el Obispo y el Capítulo catedralicio".<sup>3809</sup> Ya en 1621, mientras el Obispo Carranza estaba ausente, el Deán Zaldívar --que representaba al capítulo catedralicio-- tomó posesión de su prebenda antes de que Carranza pudiera decidir acerca del asunto, lo que creó en este último una imagen negativa. Al actuar adelantándose a la decisión de Carranza, Zaldívar socavó el poder del Obispo para designar prebendados.<sup>3810</sup> Con relación a la distribución del principal ingreso de la Iglesia (el diezmo), de acuerdo con la Real Cédula de Febrero de 1541, éste debía dividirse en cuatro partes iguales, una porción para el Obispo, otra para el

capítulo catedralicio, y las otras dos partes debían ser separadas mas adelante en novenos, de los cuales dos debían ser reservados para la corona, tres para la construcción de iglesias y hospitales, dos para salarios de los curas, y las dos porciones restantes debían ser separadas para pagar a los dignatarios y subalternos de la diócesis.<sup>3811</sup> La Bula de Erección promulgada por el Obispo Carranza, sin embargo, estableció la distribución del diezmo en tres partes --una parte para el Obispo, otra para el Capítulo, y la última tercera parte para la corona.<sup>3812</sup> Considerando que el Capítulo Catedralicio de Buenos Aires estaba compuesto por cuatro prebendados, se puede concluir que cada uno de estos miembros recibía una doceava parte del diezmo total. En otras palabras, la Bula de Erección de Carranza significó que el Obispo ganaba cuatro veces lo que recibía cada uno de los otros miembros del Capítulo Catedralicio. No cabe asombrarse, esta desigual distribución del ingreso eclesiástico, a pesar de las intenciones de la Real Cédula de 1541, se transformó en una seria fuente de conflicto. Esto se debía obviamente a la corrupción del Obispo en su defensa del código establecido para la división apropiada del ingreso eclesiástico. Debido a esta voluntaria violación de la Real Cédula, el Obispo recibió \$1.838 de un total recaudado de \$6.000, en lugar de \$1.500, la cuarta porción tal como estaba previsto en la Real Cédula.<sup>3813</sup>

El conflicto también afectaba las relaciones entre el clero regular y el secular. La principal fuente de conflicto entre ellos yacía en el control de las jurisdicciones eclesiásticas y la administración de sacramentos. A pesar del hecho de que los dos últimos concilios celebrados en Lima en 1583 y 1591 reforzaban el poder de los obispos, el Papa Gregorio XIV reconoció la autonomía jurisdiccional del clero regular por medio de la Bula *Quantum Animarum Cura*, decretada en 1591.<sup>3814</sup> En el área del Río de la Plata, sin embargo, debido a la escasez de población indígena, y consecuentemente, la falta de incentivo económico, el clero secular, que controlaba principalmente las poblaciones de españoles (blancos), continuó ejerciendo una suerte de hegemonía jurisdiccional. No obstante la escasez de curas en el área del Río de la Plata, el Obispo Carranza levantó objeciones a la administración de sacramentos por los clérigos Franciscanos. Específicamente, el sínodo de 1629 decretó que los curas regulares no podían administrar el bautismo.<sup>3815</sup> Este decreto beneficiaba a los Jesuitas, que luego de ese año extendieron su área de influencia de una manera drástica. En este conflicto en particular, el clero regular, debido a su rol como intelectuales tradicionales, encontraron apoyo en el estamento encomendero y su facción Benemérita. Éste último necesitaba desesperadamente contrabalancear el poder del Obispo, el principal intelectual orgánico de los intereses orientados hacia el mercado externo, así como su desesperada demanda de diezmos por medio del escudo protector de las ordenes religiosas.<sup>3816</sup>

Por razones similares, el principal conflicto entre órdenes religiosas ocurría entre dominicos y franciscanos. Por un lado, los dominicos, una orden religiosa que no poseía ninguna misión entre los indios, favorecía al Cabildo o, en otras palabras, a los intereses orientados hacia el mercado externo. Por otro lado, los franciscanos, una orden religiosa enteramente empeñada en las misiones indígenas, favorecía a los productores orientados hacia el mercado interno, centrado alrededor de los pocos encomenderos existentes. Los Franciscanos en Buenos Aires apoyaron al Gobernador Céspedes y a la facción Benemérita. En contraste, los Dominicos y Mercedarios, conjuntamente con el Obispo Fray Pedro de Carranza, un primo de Juan de Vergara, apoyó a la facción Confederada. Curiosamente, los Jesuitas permanecieron aparentemente neutrales.<sup>3817</sup>

Los conflictos también afectaron la vida interna de las Ordenes Religiosas expresada en sus capítulos anuales. Dentro de la orden Franciscana, aquellos clérigos que disientían con el Provincial Juan de Vergara, por su alianza con el Gobernador Céspedes fueron asignados a otros destinos en las reuniones celebradas en 1628. En las reuniones siguientes celebradas en 1629 y 1630, sin embargo, nuevas autoridades Franciscanas arribaron de España y radicalmente cambiaron sus políticas respecto del Gobernador Céspedes.<sup>3818</sup>

Finalmente, el conflicto también afectaba las relaciones entre el capítulo eclesiástico y el comisario del Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio, junto con los funcionarios aduaneros y los gobernadores portuarios, tenían por deber enviar sus funcionarios (comisario y notario) a inspeccionar las embarcaciones entrantes. Debiendo descubrir pasajeros no católicos (fueran ellos judíos, moros, protestantes o turcos), estos funcionarios se presentaban para obligar a regresar a los extranjeros a España. Al comisario se le pedía que ordenara una serie de preguntas concernientes a libros prohibidos. Si alguna violación de las reglas legales era encontrada, el Comisario debía encarcelar a los pasajeros ilegales y secuestrar sus libros. Cumpliendo esta tarea, el comisario se volvía uno de los más poderosos funcionarios dentro de la burocracia de la iglesia. Cuando el Obispo Carranza murió en 1632, una lucha estallo entre el Comisario del Santo Oficio Martin Martínez de Eulate, apoyado por el Gobernador Dávila, y el Capítulo Eclesiástico. A pesar de la oposición de Martínez de Eulate, el Capítulo Eclesiástico finalmente logró instalar al R.P. Gabriel de Peralta, un criollo, como Obispo provisional.<sup>3819</sup>

## **E-VI La noción de orden público en materia religiosa**

La noción de orden público en tiempos coloniales tenía tres enemigos que el estado colonial no podía tolerar: herejía, idolatría, y pecado. Todos ellos iban directamente contra el orden Cristiano, que significaba ir también contra el orden social.<sup>3820</sup> A diferencia de los virreinos Mexicanos y Peruanos, sin embargo, no hubo casos de herejía o idolatría en la gobernación del Río de la Plata.<sup>3821</sup> No obstante, hubo casos donde la distribución y propiedad de los escritos de algunos intelectuales Europeos fueron considerados heréticos y, consecuentemente, criminales.

Como resultado del desafío ideológico y del éxito popular de Erasmo, aún en los círculos literarios españoles, las proposiciones erasmianas fueron identificadas con la herejía y acabaron, en 1559, siendo prohibidas por el Papa Pablo IV y, en 1612, por el Índice español. A pesar de esta prohibición, algunos eruditos españoles, como Luis de Granada y Venegas del Busto, tuvieron éxito en difundir las ideas erasmianas. Ambos, el Obispo Pedro de Carranza, un fraile Carmelita influido por la Reforma Teresiana (un movimiento religioso liderado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz), y el cabildante Juan de Vergara, dos de los más influyentes individuos en el entourage político del Río de la Plata (que a propósito eran primos), tenían entre sus libros las obras completas de Fray Luis de Granada, incluida su famosa **Guía de Pecadores** (que de acuerdo con Marcel Bataillon tenía una clara semejanza con el **Enchiridion** de Erasmo), y que antes de ser expurgada en 1561 había sido incluida en el Index.<sup>3822</sup> Además, Juan de Tapia de Vargas, un comerciante, terrateniente y político, era uno de los pocos que tomó partido a favor del Gobernador Céspedes en 1629, así como el único que trató en el siglo XVII de fomentar la manufactura local. También tenía en su biblioteca privada la "Agonía del Tránsito a la Muerte", de Venegas del Busto, que siguiendo a Bataillon, tomaba

prestado capítulos enteros de la "Preparación para la Muerte" de Erasmo.<sup>3823</sup> Por un lado, el Obispo Carranza estaba enteramente comprometido durante la década de 1620 con los intereses de la facción Confederada, orientada hacia el mercado externo, con la cual sus intereses burocráticos y personales se hallaban estrechamente ligados. Por otro lado, el Cabildo Eclesiástico, que gobernaba la principal iglesia de la nueva diócesis de Buenos Aires, y muy específicamente su diácono Paraguayo Francisco de Zaldívar, estaba totalmente imbuido de los intereses de la facción Benemérita, orientada hacia el mercado interno.<sup>3824</sup>

De una forma similar, los comportamientos pecaminosos eran también castigados por el estado colonial. En cualquier momento en que un padre de familia usaba amenazas pecaminosas, como maldiciones y blasfemias, para intentar oponerse a un matrimonio, los tribunales eclesiásticos avanzaban sobre el mismo. Cuando en 1633, Pedro de Sayas, un encomendero, se opuso al matrimonio de su hija Juana de Sayas y Medrano amenazándola con maldiciones, el tribunal eclesiástico de Buenos Aires consideró inaceptables los medios utilizados para impedir el matrimonio. Más aún, el estado colonial legitimó las restituciones cuando los colonizadores aceptaban haber cometido pecados.

A diferencia del Perú y el Alto Perú, los registros que revelan culpabilidad en los pecados cometidos contra los indios eran muy escasos en Buenos Aires. De hecho, en solo un testamento, aunque uno muy patético, se encontró una huella de tal culpa. Una frenética confesión religiosa fue declarada en una cláusula testamentaria por una anciana mujer criolla, Ana Bautista, ella misma hija del encomendero Juan Bautista Noble. Esta cláusula expresaba su convicción acerca de la ilegitimidad de su riqueza. Doña Ana estaba mentalmente torturada por los pecados cometidos por su padre en la conquista de Tucumán y Córdoba, así como por los excesos que ella misma había tolerado en su propia encomienda. Como resultado, Doña Ana confesó sus pecados en 1635 al Padre Ortensio, quien le aconsejó que restituyera la cantidad de dinero apropiada de acuerdo a los excesos cometidos. Doña Ana evaluó los excesos en \$800, y en 1635, ordenó en su testamento que fueran dados al Cap. Marcos de Sequera, marido de su nieta Ana de Matos, para que ese dinero fuera distribuido entre sus indios.<sup>3825</sup> Amén de las restituciones, los sentimientos culposos revelaban que los pecados también se expresaban a través de donaciones, legados, manumisiones, y excepciones tributarias.

## **E-VII Mecanismos canónicos para contrabalancear el poder de la sociedad política**

En forma similar, a pesar de las políticas regalistas promulgadas por la Corona española, la disciplina canónica era manipulada por algunas instituciones eclesiásticas (por ejemplo, los tribunales eclesiásticos) para contrabalancear el poder de la sociedad política. Entre ellas, las categorías más centrales, del interés de la iglesia, por la disciplina y la obediencia, eran las mayores fuentes de conflicto, y los legados hierocráticos principales de la Iglesia para interferir con la sociedad política, eran los mecanismos de excomunión y absolución.<sup>3826</sup> En tres diferentes oportunidades en una década, Buenos Aires experimentó un intercambio público de medidas punitivas entre funcionarios públicos. El Obispo Carranza excomulgó al Gobernador Céspedes en 1627, y el Obispo Aresti excomulgó a ambos gobernadores Dávila y Cueva y Benavídez en 1637 y 1640.<sup>3827</sup>

Estas autoridades civiles excomulgadas tenían algo en común: habían desobedecido al obispo y como resultado se los había considerado contumaces. Su

expulsión no fue el resultado de denegaciones fiscales (el pago de diezmos) o de violentas actitudes contra clérigos o cómplices heréticos, sino más bien el de situarse en obstinada desobediencia a la iglesia en sus tribunales. Como resultado directo de la orden de excomunión, los gobernadores, como Céspedes, Dávila y Cueva y Benavidez, se encontraron impedidos de administrar justicia, mantener la disciplina en la milicia, retener a los delincuentes en las cárceles, y de presidir las asambleas capitulares anuales donde las nuevas autoridades eran elegidas (por lo común cada primero de enero).<sup>3828</sup>

Por un privilegio excepcional, el poder de excomulgar era atributo de algunos prelados debajo del rango de obispo, tales como el diácono y el vicario. A propósito, en 1635, el Gobernador Dávila se quejó de que el Vicario General, Lucas de Sosa, impuso bajo pena de excomunión que "durante los ayunos los notarios no deben escribir, los Barberos no deben afeitar, las carretas no deben entrar ni salir de la ciudad, y que las negras e indias no deben lavar la ropa".<sup>3829</sup> El poder de excomulgar, sin embargo, ya sea ejercido por obispos o por prelados inferiores, no podía ser usado indiscriminadamente. Desde que un obispo al excomulgar estaba actuando como una autoridad ordinaria, su poder de excomulgar estaba restringido exclusivamente a personas pertenecientes a su jurisdicción.

Cada vez que los obispos abusaban de su derecho de excomulgar, los gobernadores solicitaban de la Real Audiencia una real provisión **de fuerza**, un mecanismo de atajo para extender la protección real a sujetos que vivían en áreas remotas de las audiencias, con el fin de forzar al obispo la absolución correspondiente, significando esto simplemente la revocación de la sentencia. Si la Audiencia decidía que el gobernador excomulgado no se había excedido en su autoridad, entonces el obispo estaba obligado a absolverlo.<sup>3830</sup> Era esta absolución la que efectivizaba la reconciliación del excomulgado con la Iglesia. Ya en 1586, el Gobernador Torres de Navarrete obtuvo de la Real Audiencia una provisión real para asegurar la absolución de la excomunión del Obispo Guerra.<sup>3831</sup> De igual forma, en 1639, el Gobernador Cueva y Benavidez requirió de la Real Audiencia una provisión real que demandara una absolución del Obispo.<sup>3832</sup> De esta manera, la jurisdicción eclesiástica finalmente permaneció sujeta al poder secular.

## **E-VIII La administración de sacramentos**

Luego del interés de la iglesia por la disciplina y la obediencia, central para su supervisión de la moralidad individual, venía la administración de sacramentos. Entre ellos, los sacramentos de confesión, bautismo y matrimonio eran cruciales. Para la conducta de la vida privada individual, la influencia más grande del cuidado pastoral era ejercida, de acuerdo a Max Weber, cuando el sacerdocio, facultado para distribuir gracia "divina", "... combinaba casuística ética con el sistema racionalizado de penitencias eclesiásticas".<sup>3833</sup> Entre esas penitencias, administradas por el clero en el otoño de la conquista y la colonización, la restitución (una suerte de indemnización o expiación) ocupaba un lugar central.<sup>3834</sup> Considerando la pequeña cantidad de indios tributarios existentes en el área de Buenos Aires (aproximadamente unos 600 indios), sin embargo, la penitencia de restitución era aquí muy raramente administrada.<sup>3835</sup>

Luego de la confesión sacramental, central para la preocupación de la Iglesia por la ética y una de las principales fuentes de los conflictos políticos, sociales y morales eran las instituciones del bautismo y del matrimonio. Como los curas se rehusaban a legitimar el fruto de relaciones sexuales con Indios que no habían sido bautizados, el bautismo devino un requisito esencial para alcanzar la "igualdad" y para incorporar los indios a la

colonización española.<sup>3836</sup> Tan extendido fue este requisito que las ordenes religiosas luchaban entre sí esencialmente por el derecho a ejercer este sacramento así como por el derecho de recaudar los correspondientes aranceles. Durante el final de la década de 1620, la Iglesia Diocesana de Buenos Aires levantó los impedimentos para la administración del bautismo por los Franciscanos. En el Sínodo de Charcas, de 1629, el Obispo decretó que los curas regulares no podían administrar el bautismo.<sup>3837</sup> Al hacer esto, la iglesia secular retenía el control sobre las actividades de las órdenes religiosas.

El sacramento del matrimonio también devino una fuente principal de conflicto, según que la pareja casada fuere india o española.<sup>3838</sup> Aunque la población que era financieramente capaz de oponerse a matrimonio en los tribunales eclesiásticos era en gran medida procedente de la elite colonial, las acciones de los tribunales eclesiásticos vinieron a fomentar la movilidad social, removiendo la tradicional estratificación social estamental. La prevención en la formación de tales constreñimientos sociales o étnicos ayudó a la elite porteña para evitar convertirse en una rígida oligarquía. Virtualmente todas las objeciones fundadas en la distancia social fueron esgrimidas por parientes blancos que se oponían al matrimonio de sus hijos con un criollo, un portugués, un mulato, o un indio. Sólo cinco casos en un total de 120 resumidos por Raúl A. Molina detallan el origen étnico de prometidas y prometidos. Tres casos se referían a varones blancos casando con mujeres indias, un caso estaba ligado a una mujer criolla forzada a casarse con un Portugués, y otro caso estaba relacionado a un varón blanco casando con una mulata.<sup>3839</sup> En este sentido, las decisiones de los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires, a diferencia de los tribunales seculares del siglo XVIII, sugieren (a pesar de la ausencia de estadísticas) una más alta contribución a la miscegenación y al matrimonio interracial. En el mismo sentido, la omnipotente presencia del capital comercial puede haber contribuido fuertemente a acelerar el matrimonio interracial. A propósito, ya en 1606, cuando el Gobernador Hernandarias trató de expulsar a los comerciantes Portugueses, el Obispo Loyola instrumentó el sacramento del matrimonio, uniendo aspirantes Portugueses con prometidas criollas para evitar su expulsión. La manipulación de la institución del matrimonio por un intermediario eclesiástico generó un duro conflicto entre la Iglesia y el Gobernador Hernandarias que fue muy pronto superado.<sup>3840</sup>

Las objeciones al matrimonio ocurrían también entre indios, negros, artesanos, y miembros de las castas.<sup>3841</sup> Los curas rurales, por ejemplo, tenían a su cargo la responsabilidad para que los indios se casaran dentro de sus encomiendas. Los indios de las encomiendas de Baradero, Bagual o Tubichaminí, sin embargo, casaban con indios tributarios de las provincias interiores, a pesar de las normas municipales en contrario, como la que fue decretada en 1610.<sup>3842</sup> Las Cofradías de artesanos también debían cuidar que las hijas de los maestros artesanos se casaran con integrantes de su mismo oficio. Cuanto más alta la casta de un artesano, sin embargo, más abierta eran las políticas de reclutamiento dentro de un oficio, y actitudes discriminatorias contra forasteros no eran practicadas. Por ejemplo, de acuerdo al testamento de Juan Jurado, emitido en 1638, una de sus hijas casó con Mateo Arnal, un zapatero; otra casó con Manuel Fonseca, un cerrajero; y la mayor caso con Manuel González, un herrero.<sup>3843</sup> En su lugar, entre los miembros de las castas más bajas, era para la ventaja de un oficio artesanal, disminuir el riesgo de fricciones inter-oficios, si el nuevo oficial artesano era conocido de los viejos maestros. Esta es la razón por la cual entre los indios que residían en Buenos Aires, los artesanos trataban de retener los yernos estimulándolos a continuar sus talleres. Por ejemplo, de acuerdo al testamento del indio sastre Miguel, emitido en 1636, su hija casó con Domingo Negreros, también un sastre.<sup>3844</sup>

Desde que, de acuerdo a las regulaciones españolas, el padre sobreviviente estaba obligado a entregar en el momento del matrimonio de sus hijos cualquier herencia del padre fallecido, los padres sobrevivientes que deseaban mantener la supervisión de su herencia combatían el matrimonio de sus hijos con el fin de impedir su pérdida material correspondiente. Con el fin de combatir el matrimonio de sus hijos, los padres recurrían al uso de violencia física, a la renuencia a ceder una herencia, o a las objeciones a las diferencias económicas o étnicas entre la pareja. Cuando tenía lugar una objeción inaceptable al matrimonio, el tribunal eclesiástico juzgaba o bien ordenar el depósito, o bien conceder una dispensación de amonestaciones. El propósito de colocar una mujer, como Catalina de Enciso, María Barbosa, Ana Hernández y Rojas, o Juana de Sayas y Medrano, en depósito era para salvaguardar su derecho a elegir casarse o permanecer soltera, libre de toda coerción de sus padres. Para que un depósito tuviera lugar, Catalina de Enciso, por ejemplo, tenía que ser físicamente despojada de las manos de su padre, Pedro Rodríguez de Cabrera, de manera que pudiera ser colocada en manos de un partido neutral, la casa de Tomás Rosende. La voluntad de los funcionarios eclesiásticos de apartar a una joven de la casa de sus padres para colocarla en depósito simbolizaba, de acuerdo a Patricia Seed, un interés relativo por la libre voluntad matrimonial de la joven.<sup>3845</sup>

La primera condición bajo la cual se otorgaban dispensas de prohibiciones por un tribunal eclesiástico ocurrían una vez que la joven afirmaba su voluntad de apartarse de la casa de sus padres y casar con el hombre con el cual se había fugado. Esta estrategia era claramente la respuesta a cualquier intento de impedir un matrimonio, por cuanto tenía el efecto de casar inmediatamente a la pareja.<sup>3846</sup> Como consecuencia, las fugas estaban en algunos casos protegidas por las autoridades eclesiásticas. Por ley, las prohibiciones eran tres en número, cada una dispensada durante las festividades religiosas al momento de la misa mayor en un intervalo de tres semanas. Una vez que la tercera prohibición fue dispensada, el compromiso o matrimonio se lo consideraba un hecho. A menudo ocurría, sin embargo, que el novio o la novia renegaban de su promesa antes que la tercer prohibición fuera dispensada. Por ejemplo, en 1618, Luis y Alfonso Carballo, ambos barberos originarios de Lisboa, arribaron a Buenos Aires, donde se comprometieron a casarse, respectivamente, con María Hernández, una hija de Andrés Lozano de Saravia, un viejo poblador de Buenos Aires, y con Dominga Barbosa, la viuda de Mendo Álvarez, un comerciante Portugués.<sup>3847</sup> Ambos Carballos, a pesar de haber obtenido la dispensa de la segunda prohibición, decidieron pedir al tribunal eclesiástico que cancelara la dispensa de la tercer prohibición. Alfonso Carballo argumento en Julio de 1619 que se estaba yendo inmediatamente al Brasil, y Luis Carballo alego, nueve meses después, que estaba enojado y desilusionado, que "...no había mas espacio para negociar", y que deseaba apartarse de su anterior solicitud.<sup>3848</sup> Las negociaciones matrimoniales, en ese tiempo, se parecían en algunos casos a negociaciones financieras donde los sentimientos y la belleza física no jugaban ningún rol y donde un intermediario era necesario para lograr un pacto conveniente. Mientras que los dos Carballos no tenían nada que perder, sin embargo, ese no era el caso para sus ex prometidas. Por cuanto, de acuerdo con Gutiérrez, "...ser conocido que una hija había sido seducida o había perdido su virginidad significativamente alteraba su valor simbólico en las negociaciones correspondientes".<sup>3849</sup> Sin embargo, uno encuentra que la amenaza de los hermanos Carballo era sólo una estratagema para lograr elevar la dote, pues más tarde ambos Carballos casaron con sus respectivas prometidas. Alfonso Carballo actuó como padrino de María Barbosa, una hija de Domingo Barbosa, y fue acusado por Juan de Sequeyra de golpear a su hijastra por estar preñada.<sup>3850</sup> En el caso de Luis Carballo, mas luego enviudo de María Hernández y contrajo segundas nupcias con

Gerónima Santana.<sup>3851</sup> Una vez enviudado de Gerónima Santana, Luis Carballo se mudó a la vecina Santa Fé donde aún tuvo la energía de casarse más veces, la cuarta y última con María Rodríguez, hija del Cap. Cristóbal de Basualdo y de María de Centurión.<sup>3852</sup>

Aparte de ser una fuente de conflicto social, la institución del matrimonio era también una fuente de conflictos morales. El Obispo Fray Pedro de Carranza, el principal intelectual orgánico de la Iglesia, responsable de administrar el tribunal eclesiástico, conocía perfectamente bien las prescripciones del derecho canónico relativa a la moral en el matrimonio, así como la literatura que lo apoyaba. Carranza mencionó, entre los libros que donó al Prior de la Orden Carmelita, **De Sacramento Matrimoni** (1602), escrito por el Jesuita Tomás Sánchez.<sup>3853</sup> El libro de Sánchez, el cual tomaba prestado del libro de Vives **Institutiones foeminae christiane** (1538), celebraba el valor moral del matrimonio cristiano contra las concupiscencias sugeridas por las novelas como **La Celestina**. El punto de vista de Vives ponía en alta estima la vida conyugal. Este énfasis en la vida conyugal era debido a la influencia de las ideas de Erasmo sobre la libre voluntad en la elección matrimonial por parte de varón y mujer.<sup>3854</sup> La doctrina de Erasmo era una reacción contra la teoría de la predestinación y la responsabilidad estatal en las elecciones matrimoniales elaboradas por Lutero y Calvino.<sup>3855</sup>

En los libros de Sánchez y de Vives, las objeciones al matrimonio, llamadas impedimentos, fueron extensamente detalladas. De acuerdo a sus trabajos, los impedimentos canónicos consistían en inadecuaciones generales y específicas al matrimonio. Entre las primeras estaban la edad, la impotencia, el sacerdocio, el tener otro esposo vivo, y el no ser católico. Entre las últimas estaba la consanguinidad, la afinidad, el compadrazgo (parentesco espiritual), el crimen y la deshonestidad sexual.<sup>3856</sup> Desde que la coincidencia extrema y las excepciones exactas especificadas por la ley canónica eran necesarias para oponerse a un matrimonio, el número de oportunidades para los parientes de hacer uso de estas objeciones estaba acentuadamente restringido.<sup>3857</sup> De 120 casos recogidos en los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires, correspondientes al periodo 1611-33 y resumidos por Raúl A. Molina, solo cuatro casos fueron encontrados en los que fueron empleadas las objeciones para impedir un matrimonio. Un caso estuvo vinculado con la impotencia, otros dos estuvieron relacionados con la edad, y en otro caso, la excusa para la queja fue la promesa de la vocación eclesiástica.<sup>3858</sup>

Una manera de casarse contra la oposición de los padres o parientes era por apelación a un tribunal eclesiástico. Durante el transcurso del siglo XVII, uno puede resumir tres principales motivos considerados como razones inaceptables para intentar impedir un matrimonio: 1) uso familiar de la violencia física; 2) rechazo familiar para otorgar una herencia; o 3) las objeciones familiares acerca de diferencias económicas o étnicas entre los eventuales contrayentes. En solo tres casos el uso de la amenaza o la violencia física fue registrado en Buenos Aires. Cuando Isabel de Encinas planeó casar con Juan Bernal en 1616, un pariente cercano se opuso al arreglo y amenazó con cometer un "acto diabólico" si tal matrimonio era consumado.<sup>3859</sup> En forma semejante, en 1629, cuando Pedro Toscano intentó casarse con María Barbosa, Juan de Sequeira acusó al padrastro de María, Alfonso Carballo, de haber maltratado a su hija por estar preñada y de golpearla con un palo.<sup>3860</sup> En el caso de Juana de Sayas y Medrano, que casó con Alonso Ramírez, un viudo de Luisa Villegas, como su padre Pedro de Sayas no pudo imponer su voluntad, la castigo indirectamente al darle a su otra hija la ventaja del tercio y el remanente del quinto de su herencia.<sup>3861</sup> No obstante estos pocos casos, las diferentes características sociales de los victimizadores, uno comerciante (Alfonso Carballo), quien

podría haber tenido una actitud mas moderna hacia el sexo y el matrimonio, y el otro un encomendero (Pedro de Sayas), ambos reaccionaron de la misma manera. Lograr un balance final para el rol desempeñado por la Iglesia respecto del sacramento del matrimonio no es una tarea sencilla. El desempeño pareciera a primera vista contradictorio. Mientras por un lado los Indios fueron impedidos de mezclarse con negros o indios de otras encomiendas, los criollos y españoles fueron estimulados para quebrar la estratificación social estamental y las normas familiares patriarcales.

## Capítulo II-B-7      **Fisuras entre el clericalismo del fuero eclesiástico y el orden regalista (Patronato Real).**

### Índice

- F-I      Subrogación de las facultades y prerrogativas de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias.
- F-II      Facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos.
- F-III      Superposición de competencias.
- F-IV      Resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real.
- F-V      Incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.

### **F-I      La subrogación de las facultades y prerrogativas de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias.**

La victoria de las políticas regalistas en el siglo XVIII, terminaron por someter el clero al monarca español.<sup>3862</sup> Dichas políticas se derramaron en toda la estructura eclesiástica del imperio. Los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias se volvieron renuentes a ceder sus facultades y prerrogativas a los Obispos, los Cabildos Eclesiásticos y los Asesores Letrados.

En 1748, en Corrientes, el Teniente de Gobernador Nicolás Patrón,<sup>3863</sup> enfrentado al dominante clan de la familia Casajús, y en connivencia con el Obispo de Buenos Aires Manuel Antonio de la Torre y su Cabildo Eclesiástico, ordenó dividir el curato de San José de las Saladas dando comisión al cura y vicario de Corrientes Dr. Antonio Martínez de Ibarra,<sup>3864</sup> para demoler la iglesia y pasarla a nuevo sitio.<sup>3865</sup> Resistida la maniobra por su primo, el Cura y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición José Francisco de Casajús, logró siete años más tarde sentencia favorable del Obispo Dr. José Antonio Bazurco.<sup>3866</sup> Diez años más tarde, en 1764, el mismo conflicto se reavivó desatando la famosa rebelión de los Comuneros de Corrientes. Según José Borjes, testigo en el juicio contra los amotinados, dos eran los motivos de la rebelión, el uno el esfuerzo que el Tte. Gob. Manuel de Rivera y Miranda, hechura de los Jesuitas, hizo por

"...prehender a Don Sebastián de Casajús, habiéndose por ello disgustado con el Cura de las Saladas su hermano y con el de Corrientes Don Antonio Martínez [de Ybarra], a quien le instaba porque le allanase la Iglesia [omitiera la inmunidad eclesiástica] y éste se escusaba por decir que la Iglesia de las Saladas la había de

allanar el Cura de ella como tal Cura y Vicario, aunque fuese hermano del que se pretendía extraer".<sup>3867</sup>

El segundo motivo de la rebelión habría sido el que habiendo el Tte. Rivera procurado desentrañar la confederación que entre los dos curas había, descubrió

"...que nacía de una carta dotal falsa según han dicho varios que el Cura Martínez valiéndose de la avilidad del viejo Casajús Padre de Don Sebastián y de el Cura de las Saladas había hecho formar a favor de una sobrina suya, que estaba casada con un Portugués llamado Don Francisco González de Macedo, para haber hecho con ella que su sobrina se quedase con todos los bienes de su difunto marido a título de una dote imaginaria que jamás tuvo, ni sus parientes fueron capaces de darle; en odio y venganza del empeño que dicho Tte. Rivera parece manifestó en verificar la falicidad de aquella Carta Dotal por ser en perjuicio de la Real Hacienda, y en reconocimiento del beneficio que había recibido del viejo Casajús, se unió con su hijo el Cura de las Saladas, tal vez también temeroso de que este Don Sebastián no descubriesen el Pastel, y ayudó a que el Tte. no sacase de la Iglesia a dho Dn. Sebastián, y fomentó el levantamiento del Pueblo, para que preso el Teniente Rivera se metiese todo a tablas".<sup>3868</sup>

En Cochabamba, casi tres décadas después, en 1790, se suscitó una disputa entre el Gobernador-Intendente Francisco Viedma y el Obispo de La Paz, respecto a la designación de sacerdotes.<sup>3869</sup> Pasado otro par de décadas, en 1809, Acevedo (1965) nos revela que habiéndose dividido el Obispado de Córdoba del Tucumán en dos, se desató en Salta alrededor de la provisión de cargos catedralicios un agudo conflicto entre su primer Obispo Nicolás Videla del Pino,<sup>3870</sup> partidario de posiciones anti-regalistas, y los miembros de su Cabildo Eclesiástico, el Deán Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi,<sup>3871</sup> y el Canónigo Dr. José Miguel de Castro,<sup>3872</sup> afectos a las doctrinas regalistas. Para Isasmendi y para Castro, la creación por parte del nuevo Obispo Videla de tres nuevos cargos catedralicios (arcediano, chantre y tesorero) constituía un abuso que despojaba al Rey de su derecho de Patronato.<sup>3873</sup> El ánimo del Rey había sido sólo el de "...proveer la dignidad de deán y dos canongías", lo cual constituía "...suficiente número para la formación de un cabildo eclesiástico con concepto a las rentas que podría proporcionar un Obispado dividido".<sup>3874</sup> Uno de los religiosos que más se obstinó en manifestar su regalismo en el Río de la Plata fue el Maestro General de la Orden de Santo Domingo Fray Baltasar de Quiñones, cuando en 1793 publicó sus Observaciones al Capítulo provincial platense de 1791.<sup>3875</sup> Asimismo, el primer laico de las provincias del Río de la Plata en reclamar jurídicamente las prerrogativas del Patronato Real fue el abogado defensor de los integrantes del Cabildo de Córdoba, el Dr. Mariano Pérez de Saravia.<sup>3876</sup> En el Paraguay, en 1783, el Gobernador-Intendente Don Pedro Melo de Portugal le informaba al Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, haber exhortado al Cabildo Eclesiástico de Asunción "...no executara nombramiento alguno de los Tenientes de Cura destinados al servicio de las Vice-parroquias del campo sin acuerdo mío como Real Vice Patrono de esta Provincia".<sup>3877</sup> Cinco años después, en 1787, el Cabildo secular de Asunción era del parecer que el Colegio Seminario de San Carlos estuviera enteramente sugeto al Vice-Patrono Real como lo estaba el Colegio de Buenos Aires.<sup>3878</sup> Y doce años después, en 1799, cuando el Provisor y Canónigo de la Catedral de Asunción Dr. Juan Bernardo de Arroquia de Osés,<sup>3879</sup> solicitó la propiedad del Rectorado del Real Colegio Seminario de San Carlos,<sup>3880</sup> perteneciente al Capítulo Catedralicio de Asunción, Félix de Azara y Fr. Luis de Velasco nos cuentan que el Gobernador del Paraguay Joaquín Alós y Brú, en su condición de Vice-Patrono Real, se la negó, para dársela en cambio al correntino Don José

Baltasar Casajús.<sup>3881</sup> Los Cabildos Eclesiásticos tenían erigidos con título de Vice-parroquias diferentes seminarios y capillas, y en ellas diputaban (elegían) sacerdotes seculares, despachándoles títulos de Rectores, Vicarios, Coadjutores y Tenientes de Curas Propietarios. Los coadjutores eran regularmente

"...los eclesiásticos más novatones y pobres que a título de tener como vivir toman sobre sí esta carga con la recompensa de las primicias, oblacones, y demás derechos parroquiales que les asigna el Cabildo Eclesiástico por vía de estipendio de su servicio, sin reservársele al Cura propietario cosa alguna de estos frutos de su Iglesia en todo el territorio del Tenientazgo".<sup>3882</sup>

Más aún, por carecer la mayor parte de ellos "...del conjunto de requisitos que demanda para su perfecto desempeño, un oficio tan escrupuloso, no produce en aquellas gentes los efectos saludables,...[de lo que] resultan muchos encuentros, disensiones y pesadumbres".<sup>3883</sup>

## **F-II La facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos.**

En cuanto a la facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, los Gobernadores eran también renuentes a subrogar las facultades y prerrogativas del Patronato Real a los Obispos, y menos aún a aquellos Obispos pertenecientes a otras jurisdicciones. El que los conventos localizados en una provincia tuvieran sus autoridades en otra jurisdicción, dependientes de un Obispado vecino, no solo colisionaba con el Vice-Patronato que ejercía el Gobernador-Intendente sino que se prestaba a los enfrentamientos que, según Ganster (1993), alimentaban los diferentes regionalismos.<sup>3884</sup> Estos fueron los casos de Cuyo y de Córdoba.<sup>3885</sup> En una causa judicial por un crimen ocurrido en 1766 -- meses después de producirse en Madrid el Motín de Esquilache-- en el Convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba --pero iniciada también en Santiago de Chile por depender dicho Convento de las autoridades residentes en dicha ciudad-- se provocó un serio conflicto de superposición de competencias, por cuanto la causa había sido despachada también al Obispado de Córdoba, el cual estaba subordinado a la Real Audiencia de Charcas.<sup>3886</sup>

La circunstancia de que el convento Mercedario en Córdoba tuviera sus autoridades en Chile, dependientes del Obispado de Santiago de Chile, colisionaba con el Vice-Patrono, que residía en Córdoba. El caso Cordobés ocurrió a comienzos de la década del 60, cuando el Regidor Diputado Juan Vicente Piñero Pacheco,<sup>3887</sup> fue expulsado del Cabildo de Córdoba por una facción política encabezada por el Gobernador de Córdoba Juan Manuel Campero,<sup>3888</sup> y la clásica familia de los Allende, adversaria de los Jesuitas y allegada a la defraudación del Ramo de Sisa y a los intereses de la cría de mulas procedentes del litoral porteño. Piñero Pacheco había sido expulsado so pretexto de haber incurrido en amancebamiento, pero en realidad debido a la circunstancia de pertenecer al clan de los Echenique, más ligado a los Jesuitas, al régimen encomendil y a las vaquerías que se practicaban en el desierto.<sup>3889</sup> Con ese motivo Piñero buscó asilo en el Convento Mercedario de San Lorenzo, cuyos fondos financieros él mismo administraba y que a la sazón dirigía el Provisor y Vicario General Doctor Fr. Pedro Pablo de Allende y Losa.<sup>3890</sup> Es entonces, que al poco tiempo, violando el "honor, clausura, y sagrado de este Convento" y el asilo e inmunidad o fuero que prescribían los Sagrados Cánones,<sup>3891</sup> Fr. Pedro Pablo Allende, como portavoz del Gobernador Campero y de los intereses de la facción anti-Jesuitica del clero Mercedario, personificados en la Casa de los Allende,<sup>3892</sup>

permitió que el Juez Real, designado por el Cabildo, extrajese del Convento al Regidor Piñero.<sup>3893</sup> El documento añade que a la dirección e influjo de este profanamiento sacrílego concurren

"...como sangrientos fraticidas e hijos adúlteros de la religión SMe los PP Pdo Fr. Ignacio Lescano, Lector Fr. Francisco Xavier Olmos, y novísimamente el R.P. Provincial absoluto Fr. Juan Esteban Herrera, siendo íntima la amistad y notoria la coligación que han tenido y tienen con aquellas familias y sus cabezas".<sup>3894</sup>

Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico, donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos, las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Allende, ante el Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.<sup>3895</sup> Fue entonces, a partir de dicho proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".<sup>3896</sup> Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Jesuiticos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.<sup>3897</sup> En efecto, el R.P. Provincial Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio Rodríguez Flores,<sup>3898</sup> Simón Rodríguez Flores,<sup>3899</sup> Lorenzo López de Osornio,<sup>3900</sup> Vicente Chaparro,<sup>3901</sup> y José Esquivel,<sup>3902</sup> aparentemente por haberse solidarizado en el pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del convento.<sup>3903</sup> Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-Jesuiticos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>3904</sup> encargado de la recepción del Ramo de Sisa.<sup>3905</sup> El Virrey Amat dio su apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Jesuiticos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y León.<sup>3906</sup> Cabe recordar que Amat llegó a scandalizarse porque los delincuentes usufructuaran el asilo eclesiástico para sus andanzas.<sup>3907</sup> Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los contrabandistas quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.<sup>3908</sup> Asimismo, los religiosos ligados a los intereses pro-Jesuiticos recurrieron al Metropolitano de los Mercedarios residente en Santiago de Chile contra la autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-Jesuiticos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.<sup>3909</sup> Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclara el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictamen", violatorio de los fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>3910</sup> había dado al Teniente de Rey Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,<sup>3911</sup> a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,<sup>3912</sup> y José Martínez de Candia.<sup>3913</sup> Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán

Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,<sup>3914</sup> condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,<sup>3915</sup> y Santiago de Allende y Losa.<sup>3916</sup>

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile y una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una metodología violenta, por cuanto se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,<sup>3917</sup> y publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los Echenique,<sup>3918</sup> habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte hombres armados, a pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.<sup>3919</sup> En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Jesuiticos, llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para invadirle".<sup>3920</sup> De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que sufragaba a los auxiliares, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".<sup>3921</sup>

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caxa por las cuadras y cantones públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".<sup>3922</sup>

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General José Francisco de Galarza,<sup>3923</sup> fue ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".<sup>3924</sup>

### **F-III La superposición de competencias.**

En otra causa en la que estaba involucrado el Convento de Predicadores de San Juan --en la que intervino el Obispo de Santiago de Chile por depender dicho Convento de la provincia Dominicana de San Lorenzo Mártir de Chile--<sup>3925</sup> se provocó también un serio conflicto de superposición de competencias, alimentado también por viejos regionalismos, por cuanto los frailes cuyanos, agraviados por los frailes chilenos, habían recurrido al Cabildo de San Juan, el cual para ese entonces estaba subordinado a la Gobernación-Intendencia de Córdoba. Sus religiosos,<sup>3926</sup> se presentaron en 1802 ante el Cabildo para denunciar que el Prior Fr. Cayetano Bastidas, de origen chileno, afectado de una gravísima enfermedad, era sustituido por su Procurador el R.P. Lector de Teología Fr. Isidro González, también chileno, en cuyo gobierno

"...se han hecho ventas de muchos fundos de este Convento y se han recibido varias cantidades redimidas por los inquilinos sin que el producto de estas, ni el de aquellas se haya impuesto a censo ni invertido en compras que sustituyan las ventas".<sup>3927</sup>

Un año más tarde, en 1803, a la muerte de Bastidas, el Provincial Fr. Marcos Vázquez impuso de Superior a Fr. Matías José del Castillo, quien recurrió por ante la Real Audiencia de Buenos Aires el rechazo del Cabildo con inusual éxito.<sup>3928</sup> Pese a ello, los Religiosos Sanjuaninos insistieron a tal grado que en 1806 lograron por Real Despacho que los conventos cuyanos se agregaran a la provincia dominica de San Agustín, cuya jurisdicción comprendía a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay.

Analizando el comportamiento de Obispos, Gobernadores, Oidores, Comandantes de Armas y Tenientes Asesores Letrados tomamos conciencia también de la importancia que gozaban las funciones de tablas (religiosas y universitarias) en los conflictos de competencia. Quesada (1869), Brown (1910), Carbia (1914,1915,1945), Levene (1920), Legón (1920) y Bruno (1967) fueron los primeros en tomar en consideración aquellos conflictos en que estaban en juego cuestiones de etiqueta eclesiástica. Sin embargo, dichos autores no alcanzaron a vislumbrar las derivaciones sociales y políticas de dichos actos. Según documentos hallados en el Archivo General de la Nación, entre las prerrogativas de que gozaban los Gobernadores, estaba la de

"...acompañarles los dos Alcaldes a los acuerdos capitulares, todo el Cabildo a las funciones públicas y de Tabla, de ida y vuelta, salir todo él en cuerpo de tal, recibirle a las inmediaciones de la Ciudad cuando llega de afuera, y cuando entra y sale a la Visita [indagación] de la Provincia, cumplimentarlo en su cumpleaños, darle agua bendita al entrar a la Iglesia con el Cabildo, usar en ella silla, tapete, cogín y bela con arandela, y recibir la Paz por ministro más autorizado".<sup>3929</sup>

En cambio, los Tenientes Letrados, aún cuando en ellos recaía todo el Gobierno y la autoridad, sólo gozaban de la prerrogativa de que el Cabildo "...les saque y buelva a su

habitación en las funciones de Tabla y públicas".<sup>3930</sup> Respecto a los Comandantes de Armas, estos solían seguir, en el paseo del Real Pendón, detrás de los Regidores. En un caso ocurrido en Córdoba en 1807, el Regidor Benito Rueda,<sup>3931</sup> le advirtió al Comandante Francisco Rodrigo,<sup>3932</sup> "...que no podía seguir en el lugar que traía, y se retiró [este] sin discordia ni disputarlo".<sup>3933</sup>

#### **F-IV La resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real.**

Así como los Gobernadores se resistían a ceder a los Cabildos Eclesiásticos y a los Asesores Letrados la prerrogativa de designar autoridades eclesiásticas y laudar en conflictos eclesiásticos, los Virreyes se resistían también a subrogar el Vice-Patronato Real que ejercían sobre la educación superior. Los Virreyes habían accedido al Vice-Patronato sobre las Universidades luego de la Expulsión de los Jesuitas. Habiendo quedado sometidas las Universidades al Vice-Patronato Real del Gobernador de Buenos Aires primero (1767), y del Virrey del Río de la Plata después (1778), las gobernaciones donde estas universidades estaban asentadas solicitaban en vano se les cediera dicho vice-patronato. En 1785, el Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte había solicitado infructuosamente del Virrey Loreto la cesión del vice-patronato real sobre la universidad.<sup>3934</sup> Frustradas esas pretensiones, los conflictos persistieron en oportunidad en que se elegían sus autoridades. En Córdoba, la Orden Franciscana y el Clero Secular venían dirimiendo un interminable conflicto por el poder académico de la Universidad y del Colegio de Monserrat.<sup>3935</sup> Estaba este conflicto íntimamente ligado a las luchas libradas en el mismo cabildo secular.<sup>3936</sup> Este alcanzó su punto más álgido en tres distintas ocasiones: 1) durante el Rectorado de fray Pedro Nolasco Barrientos en 1774; 2) a partir de la muerte del Rector Fr. Pedro José de Parras y durante el rectorado de fray Pedro Guitián y Arias, en 1784; y 3) durante la gestión de fray Pedro José de Súlivan, en 1799.<sup>3937</sup> En favor de Barrientos se habían pronunciado en 1774 el Cabildo secular de Córdoba, el Presidente de la Junta Provincial de Temporalidades José Luis Cabral,<sup>3938</sup> el Alcalde Manuel de Estéban y León,<sup>3939</sup> y el Procurador General del Cabildo de Córdoba Alejandro Echenique.<sup>3940</sup> En ocasión del rectorado de Guitián y Arias, en 1784, el Obispo de Córdoba Fray José Antonio de San Alberto,<sup>3941</sup> enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, apoyó la gestión de Guitián y la connotación consultiva del voto de los graduados en la conducción de la Universidad.<sup>3942</sup> Por el contrario, en apoyo de los graduados, que solicitaban voto decisivo y no meramente consultivo, acudieron los miembros del Cabildo Eclesiástico: Deán Dr. Pedro José Gutiérrez, Magistral Nicolás Videla del Pino, Canónigo Gregorio Funes,<sup>3943</sup> y Chantre José Antonio Ascasubi.<sup>3944</sup> La oposición del Cabildo Eclesiástico, controlado por el estamento criollo, a la gestión rectoral del clero Franciscano obedecía, según el ex-Obispo Abad Illana, a que los integrantes de dicho Cabildo sufrían de jesuitismo, o escolasticismo, por haber sido formados en dicha Universidad.<sup>3945</sup>

Por último, en ocasión del Rectorado de fray Pedro Súlivan, en 1799, también se gestó una fuerte ofensiva contra los Franciscanos.<sup>3946</sup> Acudieron en su contra el fuerte comerciante Ambrosio Funes,<sup>3947</sup> hermano del Deán Gregorio Funes, el Regidor Defensor de Menores Benito Rueda,<sup>3948</sup> y un numeroso grupo de vecinos.<sup>3949</sup> En esta ocasión es preciso tener en cuenta que Funes había quedado profundamente resentido por cuanto Sobremonte le había escamoteado la Comandancia General de Armas en beneficio del Coronel Santiago Alejo de Allende,<sup>3950</sup> así como promovido en la jerarquía militar a Pedro Lucas de Allende,<sup>3951</sup> y a José Javier Díaz.<sup>3952</sup> En general, los Franciscanos, cuya hegemonía en la Universidad transcurrió sin interrupciones hasta la asunción del

Virreinato por Santiago de Liniers, contaron con la ayuda de la familia Allende, de su instrumento el Dr. José Dámaso Xijena "...preceptor que fué en latinidad de los hijos del finado Pedro Lucas de Allende",<sup>3953</sup> y de la facción Sobremontista. Finalmente, como a fines de siglo, el Episcopado de Córdoba, enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, se hallaba inmerso en un profundo desprestigio, así como neutralizado por los efectos del Patronato Real que impulsaban los Borbones, y el Cabildo secular seguía en manos de los Sobremontistas, mal se pudo lograr desplazar a los Franciscanos del poder académico de la Universidad.<sup>3954</sup>

También la Universidad de Charcas, Alto Perú, sujeta al clero secular, a partir de la expulsión de los Jesuitas, vivía sacudida por los conflictos de poder. Cuando en 1785, hubo cesado en el cargo de Rector de su Universidad el Dr. Gregorio de Olaso, y estando a punto de elegirse como su sustituto al Dr. Juan José Segovia,<sup>3955</sup> Olaso le soplaba al Virrey del Río de la Plata las connotaciones de Segovia, pues "...se jacta de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se reputa el tribuno del Pueblo, y el Cónsul de estas Provincias".<sup>3956</sup> Segovia fué Oidor de la Real Audiencia de Charcas, era conocido de Juan Bautista Maziel,<sup>3957</sup> se casó con la dueña de ingenios Manuela del Risco y Agorreta, y un par de meses antes de la partida de Olaso había participado en la **revolución de los muchachos**, acontecimiento provocado por la presencia del Regimiento de Granaderos de Extremadura.<sup>3958</sup> Conociendo Olaso el rol que le cupo a Segovia, en connivencia pasiva con el Gobernador-Intendente General Ignacio Flores, en dicho evento, le parecía que estaba obligado en su calidad de Rector saliente de

"...embarazarlo en cuanto fuese de mi parte, pues...no debía tolerarse ponerlo a la cabeza de un cuerpo, donde...pudiese él inspirar algunas especies sediciosas, aprovechando las proporciones de ser oídos y respetados como Maestros, los individuos, que le forman, y de componerse su mayor parte de los de su raza y facción".<sup>3959</sup>

Terminaba la esquila Olaso advirtiéndole que "...cualquier leve chispa debe con tiempo apagarse, y no permitirle el menor aire, para que llegue a cundir, y causar mayor incendio".<sup>3960</sup> Las advertencias de Olaso no fueron en vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política por la cual desterró a Montevideo al Maestre-Escuela Juan Baltasar Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de cárcel, y destituyó al Gobernador-Intendente General Ignacio Flores. Segovia purgó su condena en el presidio de Buenos Aires, para luego obtener del Rey en 1789 una reivindicación completa.<sup>3961</sup> El resultado de esta política fue la corrupción de los estudios, tal como lo aseveraba el Deán Funes en 1805, en carta al Obispo Orellana.<sup>3962</sup>

#### **F-V La incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.**

Finalmente, el ejercicio del fuero eclesiástico por parte de Obispos y Arzobispos también incidió en el equilibrio de poder existente entre las autoridades civiles mismas. El Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz vio en la Real Cédula del 9 de mayo de 1795, que despojaba a los Intendentes del ejercicio del Patronato Real, el resultado del esfuerzo del citado ex-Obispo de Córdoba y posterior Arzobispo de La Plata Fray José Antonio de San Alberto, por reducir su poder y suspender la Visita de Chayanta.<sup>3963</sup> Dicho Arzobispo era afecto a las posiciones regalistas más extremas, desde cuando había desempeñado el Obispado de Córdoba.<sup>3964</sup> El conflicto se había originado a

partir de la facultad que tenían los Curas de cobrar en las fiestas de tabla oblaciones y limosnas, más brevemente conocidos como el Arancel, único fondo del cual percibían sus ingresos o estipendios.

El ejercicio del fuero eclesiástico por parte del clero regular (Ordenes Religiosas) habría incidido en la disciplina eclesiástica mucho más fuertemente que el ejercido por el clero secular. Como el otorgamiento del fuero eclesiástico operaba en forma semejante a la avocación, inhibitoria,<sup>3965</sup> o declinatoria,<sup>3966</sup> pues substraía al beneficiado de la jurisdicción ordinaria o civil, se originaba con su aplicación una crónica indisciplina eclesiástica, nacida del desmedido goce de este privilegio y de la inescrupulosa ambición del clero regular --compuestas mayoritariamente por mestizos-- en querer monopolizar todos los cargos religiosos. También, de acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, los Contadores Reales de la Mesas Decimales de los Obispos, los Síndicos Procuradores de los Monasterios, los Contadores y Tesoreros del Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, como sub-ordenes de la corporación eclesiástica, gozaban del fuero eclesiástico y de la libertad de cargos concejiles y militares.<sup>3967</sup>

Los Mercedarios y los Agustinos fueron los que más intensamente tuvieron que ver con la asimilación de los mestizos, los criollos y los hijos naturales en los ámbitos conventuales. Los Jesuitas y los Franciscanos (estos últimos luego de la expulsión de los primeros) fueron a su vez los que más intensamente se vincularon con igual proceso de asimilación, pero en los ámbitos de la docencia, esencialmente en las Universidades de Córdoba y Charcas, donde el fuero universitario jugaba como un sub-orden del fuero eclesiástico.<sup>3968</sup> Y la Orden Mercedaria y los Conventos de Monjas Teresas y de Santa Catalina los que más influyeron en la consolidación de la base material o temporal de la Iglesia, léase administración de recursos económicos y financieros. La Orden Mercedaria, debido a su rol como administradora de los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos; y los Conventos de Monjas Teresas y de Santa Catalina, como administradores de Capellanías y Obras Pías.<sup>3969</sup>

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar.

## **Epílogo Sección II-B**

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la manipulación del fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo se interfirió mediante el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también se irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la

Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar.

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellánico, se transmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia de la modernidad absolutista; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsión practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el sexo primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

## **Sección II-C      Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal**

En este trabajo nos proponemos analizar una serie de casos ocurridos en Potosí, Oruro, Tarija, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fé, Corrientes, Misiones y Asunción del Paraguay, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas clánicas internas intra-familiares, la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, ignorado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos, que es preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.

La secular lucha en el seno de los patriciados coloniales por alcanzar los asientos concejiles, por reducir el precio de los arrendamientos de los ingenios, por rebajar o condonar las deudas contraídas por los azogueros, por reducir la tasa de interés de los censos y capellanías o por disputar en el Consulado de Comercio la conducción del Situado Real, reflejaba las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Estas contradicciones se sumaron a su vez a las contradicciones desatadas en las luchas insurreccionales o guerras de liberación nacional. En el sentido apuntado por Golte (1980), cabe preguntarse si el conflictivo desempeño de la actividad capitular se hallaba o no relacionado con instituciones corporativizadas, con fueros propios, que se resistían a la emergencia de una clase burguesa. Entre dichas instituciones, habría que determinar si la

vigencia de los estatutos de limpieza de sangre;<sup>3970</sup> la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; la aplicación de las leyes del mayorazgo en la sucesión de las capellanías y obras pías; y la discriminatoria selección de los miembros del Consulado de Comercio que se beneficiaban con la conducción del Situado Real jugaron o no algún rol. En este trabajo nos hemos reducido a indagar el rol cumplido por las impugnaciones sociales de los Alcaldes en las elecciones concejiles y en otras instituciones como la milicia y el clero. Para estudiar estas luchas hemos realizado algunos cálculos demográficos y recogido una veintena de textos de época hallados en actas capitulares y litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>3971</sup>

Cabe entonces preguntarse en este trabajo si en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata --alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- sus autoridades y cabildos fueron infiltrados por vecinos de origen ilegítimo y/o mestizo.<sup>3972</sup> Los casos más notorios de bastardización del aparato estatal, provocado por la incorporación de ediles, subdelegados, gobernadores y vicarios mestizos o plebeyos, se registraron en Potosí, Tarija, La Rioja, San Juan, Córdoba, Corrientes, Misiones, Asunción del Paraguay y la mayoría de las villas fronterizas (Orán, San Carlos, Río Cuarto, Chascomús, San Miguel del Monte, Belén, Batoví y Goya).

Así como en las secciones anteriores estudiamos las fracturas de los órdenes barroco y clerical, en esta sección nos dedicamos a investigar las fracturas y relaciones etnológicas de naturaleza étnica y dinástica, las que desarrollamos en un par de capítulos consecutivos, a saber: el análisis del estigma racial en las impugnaciones matrimoniales y recusaciones capitulares y eclesiásticas; y los privilegios nobiliarios, la legitimidad y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y eclesiásticas.

## Capítulo II-C-8

### **Ilegitimidad, 'Limpieza de Sangre' y crisis del orden dinástico-estamental**

#### Índice

- G-I Tradición historiográfica en materia de crisis socio-estamental
- G-II Distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.
- G-III Prejuicios de nobleza de los peninsulares.
- G-IV Prejuicios de nobleza de los criollos.
- G-V Concepto de fuero de nobleza.
- G-VI Nociones de plebe y de oficio infamante.
- G-VII Barbarización de los patriciados rurales.
- G-VIII. Condición social de plebeyo.
- G-IX Oficios infamantes.

"...En cuanto a los que alaban la nobleza y dicen que es de buena casa, porque puede contar siete abuelos ricos, cree que semejantes elogios proceden de gentes que tienen la vista baja y corta, a quienes la ignorancia impide fijar sus miradas sobre el género humano todo entero, y que no ven en el pensamiento que cada uno de nosotros tenemos millares de abuelos y antepasados, entre quienes se encuentran muchas veces una infinidad de ricos y

pobres, de reyes y esclavos, de helenos y bárbaros, y mira como una pequeñez de espíritu el gloriarse de una procedencia de veinticinco antepasados, hasta remontar al Heracles, hijo de Anfitríon" (Sócrates, en Platón, Diálogos Buenos Aires Ed. Panamericana, 227-228);

## G-I Tradición historiográfica en materia de crisis socio-estamental

La historiografía liberal, influida por la lectura de Thierry, atribuyó a una suerte de lucha de razas el desenlace de la transición de la modernidad absolutista a la modernidad republicana. Para ello se fundó en el rol cumplido por los criollos mestizos y mulatos -- "elemento corrosivo del orden formal de la sociedad barroca de Indias"-- quienes habrían minado la estructura de poder de la sociedad colonial. Contrariando las tesis de Azara e influido por la lectura de la obra de Humboldt (1807-35), Abad y Queipo (1813) y Alamán (1849-1852),<sup>3973</sup> Mitre (1859,1889) incurre en un reduccionismo esencialista,<sup>3974</sup> o binario,<sup>3975</sup> al recurrir a la vieja teoría de la lucha de razas, sosteniendo que la revolución americana fue no sólo una insurrección de las colonias contra su metrópoli, "...sino principalmente de la raza criolla [mestiza] contra la raza española",<sup>3976</sup> que la habría copiado del modelo revolucionario Europeo.<sup>3977</sup> Al coaligarse el criollo con el indígena, "...hacía suyos sus antiguos agravios,...[y] renegaba de la sangre española que corría por sus venas".<sup>3978</sup>

Por el contrario, para J. V. González (1888), el hecho revolucionario surgió de la propia raza vencida (indígena). La genealogía del concepto positivista de raza remonta sus relaciones de semejanza y filiación al de casta, vigente en los discursos escolástico e iluminista, pero es más abarcable pues incluye a los mestizos. La genealogía de los conceptos de clase social y lucha de clases remonta sus vínculos de semejanza y filiación a los de casta y guerra de castas respectivamente, vigentes en los discursos escolástico e iluminista. Y la genealogía de los conceptos positivistas de herencia y oligarquía remonta sus relaciones de semejanza y ascendencia al de linaje, vigente en el discurso escolástico. Pero la introducción de los nuevos conceptos positivistas de evolución y progreso tiñeron toda la trama conceptual con una novedad revolucionaria inhallable en los discursos previos. Impregnados del pensamiento positivista, Bunge (1903) y Ayarragaray (1904) concluyeron al igual que Mitre que la denominada Revolución de Independencia fue el resultado del enfrentamiento étnico-regional de los criollos contra los peninsulares.

Posteriormente, en la historiografía hispanista, André (1922) y Maeztu (1934,1942) interpretaron el proceso de autodeterminación nacional como una reacción de la aristocracia criolla, que se sentía relegada por la política borbónica, que distinguía entre la hidalguía y la nobleza. Mientras la primera, era obra de la sangre,<sup>3979</sup> la segunda era de privilegio o nombramiento real, y por ser personal y no transmisible por herencia, perduraba sólo lo que durara el cargo.<sup>3980</sup> La nueva conciencia de la distinción entre la nobleza de sangre o heredada, denominada hidalguía,<sup>3981</sup> y la nobleza adquirida o privilegiada [fruto de un nombramiento real] había sido un producto de los moralistas de la edad moderna,<sup>3982</sup> que dio lugar al nacimiento de la llamada nobleza por privilegio,<sup>3983</sup> y posteriormente a la misma conciencia burguesa.<sup>3984</sup> En tanto que la nobleza de sangre o linaje o hidalguía, cuanto más se transformaba en casta, más hereditaria se volvía;<sup>3985</sup> la nobleza de privilegio o de toga (*noblesse de robe*), como la de los militares, doctores,

licenciados, abogados, y otros profesores de la ciencia, no se heredaba, durando sólo el tiempo que se detentaba el oficio.<sup>3986</sup>

Más luego, varios investigadores, fundados en las teorías funcionalistas, propusieron la existencia de una relación entre clase social y nobleza de nacimiento. Para la formación de una nobleza indiana, Schwartz (1979), sostuvo que la política de la corona en el siglo XVI era oponerse a la creación de una nobleza legítima o titulada en Indias; y Arraz Márquez (1975), Villamarín (1978), Céspedes del Castillo (1985) y Ortiz de la Tabla (1993) aseguran que la conexión familiar entre altos funcionarios (Gobernadores y miembros de la Real Audiencia) y linajes nobles de Castilla constituyó la fuente fundamental de dicha formación.<sup>3987</sup> Más tarde, el proceso de autodeterminación nacional fue analizada no como el producto de una acción donde los fueros corporativos tomaran lugar (entre ellos el fuero de nobleza), como lo pretenden los voceros de la reacción ultra-conservadora, sino como el resultado de la acción conjunta de varios grupos políticos divergentes que coincidieron finalmente en un objetivo común. Más luego, la corriente de pensamiento funcionalista, en la cual como hemos visto se inscribieron varios investigadores Latinoamericanistas, también propuso la existencia de una relación entre clase social y segregación clánica, donde el capital comercial habría impulsado a las cerradas sociedades de casta, a un sistema abierto de clases.<sup>3988</sup> La reducción relativa de la distancia entre patricios y plebeyos sería prueba suficiente de la vigencia del proceso de movilidad social ascendente. El discurso funcionalista se caracterizó en sociología por su complejidad teórica Parsoniana y Mertoniana. La genealogía del concepto de elite remonta sus relaciones de semejanza, ascendencia y filiación a los de patriciado y aristocracia, vigentes en los discursos iluminista y positivista. Y la genealogía del concepto de status remonta sus relaciones de semejanza y ascendencia a los de orden o rango, vigente en los discursos escolástico e iluminista. Pero la introducción de los nuevos conceptos de equilibrio y modernización impregnaron toda la trama conceptual con una marca revolucionaria inexistente en los discursos que lo precedieron.

Por último, una corriente de pensamiento, influida por la post-modernidad, ha insistido que las aproximaciones historiográficas que no toman en consideración las cuestiones estamentales tampoco pueden explicar cómo las transiciones ocurrieron, ni en que consistieron. Esta puesta en consideración ha sido formulada por diversos autores en relación con los sistemas de poder (iglesias, milicias, gremios, cabildos, cofradías, cárceles, hospitales, escuelas, universidades, Hermandades, familias, etc.). La pretensión de probar nobleza de nacimiento no era, según Roig (1982) y Robinson (1979), un ardid ni un mecanismo legal mal visto en ese entonces, sino una vía legítima "...para asegurar una determinada posición social".<sup>3989</sup> En efecto, por el proceso inquisitorial de limpieza de sangre cualquier individuo podía, entre los momentos del bautismo, el matrimonio y el fallecimiento, 'ennoblescarse' legalmente, es decir cambiar un status por otro. Y por los procesos judiciales del tanteo,<sup>3990</sup> el retracto,<sup>3991</sup> y el régimen capellánico, propio del derecho de abolengo, cualquier individuo podía, al momento de escriturarse la venta de un dominio, reclamar la posesión hereditaria de bienes inmuebles urbanos y rurales o de rentas capellánicas. La mayoría de los padres que se oponían al matrimonio de sus hijos vivían angustiados no solo por los efectos raciales sino también por los efectos económicos, sociales y culturales que una filiación ilegítima, un grado menor en la proximidad genealógica con el fundador de una estirpe, o un matrimonio desigual --desde el punto de vista de la nobleza del nacimiento-- podían desencadenar. La evidencia que confirmara el temor de una ascendencia plebeya podía ser verificada en los libros parroquiales. Estas corrientes de pensamiento han concluido que al igual que la conciencia

de clase no surge automáticamente del modo de producción, ni la conciencia étnica de la nacionalidad, el origen geográfico o los atributos raciales, la conciencia estamental tampoco surge automáticamente de condiciones objetivas, sino que es social y políticamente producida a través de las continuas y repetidas interacciones de grupos.<sup>3992</sup>

Al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva Granada y Venezuela, y a diferencia de lo sostenido por Zorraquín Becú (1961) y Chiaramonte (1989) para el Río de la Plata, las consideraciones socio-étnicas esgrimidas en las impugnaciones o tachas de los candidatos a becas,<sup>3993</sup> capellanías, cargos concejiles o alianzas matrimoniales, y la división entre la milicia patricia y la de las castas (pardos y morenos) debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario.<sup>3994</sup>

## **G-II La distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.**

En el caso de las provincias interiores del Virreinato del Río de la Plata, la distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida habría arribado tardíamente. Si bien en las Milicias de las provincias que constituyeron el Virreinato del Río de la Plata, existieron Compañías de Nobleza, con sus respectivos fueros, fundadas en Reales Ordenes, esta legislación se limitaba a los hidalgos de gotera adentro,<sup>3995</sup> y no se extendió a las demás corporaciones. En cuanto al uso del Don, este parece haber sido un patrón de discriminación menos fuerte que el de noble. Su uso aparece en Buenos Aires más generalizado entre los ganaderos.<sup>3996</sup> Recién en 1785, Carlos III extendió el fuero noble a los "dueños de hacienda de moler metales", tanto en México como en Perú.<sup>3997</sup> En Potosí, en un célebre caso acontecido a fines del siglo XVIII, Don Pedro Vicente Cañete,<sup>3998</sup> siguiendo a Elizondo (1779), tuvo presente

"...que los hombres unos nacen nobles y otros se hacen tales o por las Artes que profesan, o por las riquezas, o por la bondad de sus costumbres, los cuales se llaman Nobles por Privilegio y son admitidos a todos los oficios destinados para los que lo fueren por linaje".<sup>3999</sup>

En La Paz, los ánimos de los hacendados del partido de Sicasica se hallaban soliviantados porque el Gobernador Intendente de La Paz había designado como Subdelegado Interino a la persona de Juan de Dios Helguero, curaca recaudador de Tributos del Pueblo de Sicasica. La impugnación de Helguero obedecía a que carecía de "...aquellos requisitos, que le constituyen avil, y suficiente, pues él es nacido al mundo, por la presunción que tiene a su favor, y sin prueba alguna, hijo natural; y por la línea materna está contado en la clase de sambaygo cuia descendencia regularmente es mixto de Negro e India, o viceversa, de modo que apenas por esta parte, si tiene alguna de español podrá ser de aquellos, que regularmente llaman Puchuelas, y guardando la común de que el parto y el vientre no redime de ser casta tributaria".<sup>4000</sup>

En La Rioja, el caso iniciado en 1777 por Francisco Vera y Bustamante contra Nicolás de Peñaloza y Bazán,<sup>4001</sup> obedeció en principio al inhumano trato recibido por el primero de manos del último, por el hecho de haber seducido a su hija. Si bien el documento no revela ni la identidad de sus padres ni el color de su piel, el hecho de haber firmado su escrito con el apellido compuesto de Vera y Bustamante indicaría que descendía de algunos de los hijos naturales de Francisco de Vera Muxica y Bustamante,

nacido en La Rioja a comienzos del siglo XVII, encomendero de Ischilín, Chinsacate y Cosconotas, y dueño de las estancias llamadas Quilambí y Poloto Sacate, el cual, según Lazcano Colodrero (1969), habría fallecido soltero a mediados de dicho siglo.<sup>4002</sup> Es probable también que Francisco Vera fuera hermano o primo de Tomasina Vera, esposa de Vicente Miguel Ocampo Mercado, hijo a su vez de nuestro "noble bastardo" Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán y de Margarita de Mercado.<sup>4003</sup> La descomedida actitud de Peñaloza hacia Vera respondería a que seguramente aspiraba para su hija un pretendiente que fuere o bien un funcionario o comerciante español o un criollo rico y de hidalgo linaje, es decir libre de impurezas raciales que pudieran contaminar su prosapia. Pero no sólo aspiraba un matrimonio conveniente para su hija mujer sino también para su hijo varón. En 1796, veinte años después del incidente con Vera y Bustamante, uno de los hijos varones de Francisco Peñaloza, Juan Estéban, hermano menor de la niña cortejada por Vera, se casa con Úrsula Riveros (padres luego del caudillo Ángel Vicente Peñaloza, alias "El Chacho"). Indignado por la elección hecha por su hijo, Don Nicolás le inicia con la ayuda de su hermano el Presbítero Dr. Vicente Peñaloza, un juicio de disenso contra dicho matrimonio,<sup>4004</sup> aduciendo el parentesco existente entre los contrayentes y la inconducta moral de la novia, al mismo tiempo que acusaba al párroco de haberlos casado sin su autorización.<sup>4005</sup>

Enfrentado a estos retos a su reputación, honra u honor --dado que en el primer caso el seductor no habría sido racialmente semejante, y en consecuencia no era el matrimonio la solución posible-- Peñaloza tenía abierto un sólo curso de acción, iniciar una demanda criminal.<sup>4006</sup> Si bien el documento no aclara los rasgos físicos de Vera, la mayoría de los padres que se oponían al matrimonio de sus hijos vivían angustiados con los efectos sociales que un matrimonio desigual desde el punto de vista racial podía desencadenar. La evidencia que sugería el temor de una ascendencia africana podía ser verificada en el color de la piel, el tipo de cabello, el ancho de la nariz, y el grosor de los labios.<sup>4007</sup> Considerando que en 1778 en Los Llanos de La Rioja existían 374 mulatos, zambos y negros, el doble que en Arauco, sobre un total de 536 españoles, es muy probable que Peñaloza no desconociera el origen "bastardo" del atrevido pretendiente de su hija y a que Vera portara en su rostro el estigma biológico de la impureza étnica o el mestizaje racial.<sup>4008</sup> En virtud de ello, Peñaloza extremó su celo al punto de lograr que Vera, pese a su cargo de Alcalde de Hermandad y a su ostentoso apellido, fuera arrestado bajo acusación de estupro. Con motivo de una de las imputaciones que luego Vera formulara contra Peñaloza; su abogado, cuya identidad el documento no revela, posiblemente influido por los prejuicios cortesanos que introdujeron los Borbones, le preguntó a Vera si presumía de noble como los Peñaloza.<sup>4009</sup> No pudiendo Vera dar una explicación de qué cosa era la nobleza, su abogado le leyó una definición de Aristóteles donde decía "...ser la nobleza nombre claro de los progenitores y mayores".<sup>4010</sup> Viéndolo a Vera aún más perplejo, dado que no podía asegurar si sus progenitores "...habían sido claros o turbios", su abogado le leyó otra cita del filósofo y helenista latino del siglo quinto de nuestra era, Anicio Boecio,<sup>4011</sup> que dice que también es nobleza "...la alabanza de los méritos de los padres". Como tampoco esta definición lo satisfizo a Vera, por considerar que si su padre había tenido algunos méritos nadie "...me ha alabado por ellos", su abogado le confesó no culparlo "...el haber remitido a silencio las impersonalidades que usan con usted los señores Peñalozas, si ni [Vd. mismo] se fía de los méritos de sus padres, ni sabe dar razón si fueron claros sus progenitores o no".<sup>4012</sup> A dichos agraviantes argumentos de quien decía ser su abogado, y que revelan con claridad meridiana la ideología prevaleciente en la modernidad absolutista, según la cual rigen en ella la heredabilidad de las virtudes (alcurnias) y los crímenes (estigmas) de los hombres,<sup>4013</sup> Vera respondió con

fastidio "...diciéndole que yo me defendería y probaría no con nobleza heredada de que otros presumen, sino con la adquirida por mis buenos procedimientos".<sup>4014</sup> En la defensa de esta concepción del mérito personal, heredada del renacimiento, tan esencial a una sociedad que buscaba salir del encierro y acortesanamiento a la que había sido sometida, Vera alegaba que Peñaloza no sólo ignoraba la jurisprudencia sino también la historia,

"...porque si entendiera de historia supiera que an habido muchos (y aún ahora los hay) que si muy ruin y enfermos en su origen, se an lebandado a hombrearse con las familias más realzadas, y a sido, porque an sabido desmentir con la virtud y el balor de sus corazones aquella bajeza en que fueron concebidos".<sup>4015</sup>

Esta noción de virtud y de nobleza adquirida, aunque revela prejuicios contra aquellos concebidos en forma ilegítima, era en Vera no una noción meramente instintiva, sino al parecer cultivada.<sup>4016</sup> A renglón seguido manifiesta un conocimiento inaudito de la historia antigua, que pudo haber obtenido de la lectura de las explicaciones dadas por Salustio, Cicerón, Virgilio o Tácito a la caída de la república romana.<sup>4017</sup> Es también posible que existiera la colaboración del suegro de su hermana o parienta Tomasina Vera, el "noble bastardo" Andrés Ocampo Ysfrán, que como hemos visto antes gozaba de un talento literario fuera de lo común.<sup>4018</sup> En efecto, Vera aduce, que no fue otra la razón que tuvieron

"...Alejandro para hacer a Aldolomino rey de los Sidonios [Fenicia]; Tarquino Prisco, fue hijo de un Mercader llamado Marato; Servio Tulio, de una esclava; el Aguelo de Augusto, fué platero, el Bisabuelo Sastre; Justino Traxano porquerizo, luego Baquero, y luego emperador; Agatocles rey de Cicilia fue hijo de un ollero con otros muchos de que están bien abastecidas las Istorias".<sup>4019</sup>

Cuando el seductor era un indio o un mulato y la seducida una mujer noble, el escándalo era mayúsculo al extremo de convertirse en mito o leyenda.

### **G-III Los prejuicios de nobleza de los peninsulares.**

Los prejuicios de nobleza en un peninsular solían provocar en América más de un disgusto cuando el ofendido era un criollo. En el caso de un juicio acontecido en 1804 en Salta, el Alcalde de Segundo Voto Francisco Ansede y Graña,<sup>4020</sup> peninsular, declaró en su casa con desdén, ante el Procurador José María Larramendi, que otros más altos que Larramendi, como era el caso de un Alcalde Ordinario, habían concurrido a su casa a tomarle declaración. Al replicarle, Larramendi declaró con indignación que "...serían más altos en estatura, y que [él] era noble, que tenía estudios, ciencia, medios, y consecuencia", y que el cargo de Alcalde Ordinario "...era un empleo accidental para el que sólo se necesitaba veinte años y \$500".<sup>4021</sup> Y, cuando al año siguiente, el mismo peninsular Francisco Ansede y Graña sufrió de manos del vecino de Salta Santiago Remigio Castellanos unos riendazos dados "...con perfidia y alevosía", declaró que los golpes sufridos "...se igualan a la muerte misma, pues esto importa por haberle quitado la honra, que es la vida del noble con acción tan vil y vilipendiosa".<sup>4022</sup> En Buenos Aires, el Alcalde de primer voto Gregorio Ramos Mexía aceptaba los reclamos de fuero de nobleza del preso por deudas Agustín de Erquicia,<sup>4023</sup> y numerosos vecinos solicitaron Información de Limpieza de Sangre.<sup>4024</sup> En 1757, Miguel Ruiz Moreno manifestó que son muchas las personas que se niegan a pagar el derecho de carretas por gozar de fuero.<sup>4025</sup> Doña Ana Herrera y Velazco, viuda de Carranza, reclamaba una merced de tierras alegando nobleza.<sup>4026</sup> Pedro Fermín de Necochea, esgrimía en 1795 el gozo de los privilegios de

Noble para que --por culpa de sus deudas-- no se le entorpeciera su viaje a España.<sup>4027</sup> Y José Ignacio Taybo, solicitaba en 1781

"...si es cierto que es sobrino de Antonio Taybo, Marqués de Carballo, Vizconde de San Juan, Caballero del Hábito de Santiago, Señor de vasallos con armas a la puerta de su casa, y si dentro de Cádiz trae en su coche dos tiros de mulas con dos cocheros".<sup>4028</sup>

Por el contrario, el Alcalde Manuel Antonio Warnes y el Dr. José Vicente Carrancio rechazaban en 1787 los reclamos de fuero de José Guerra Ruenes.<sup>4029</sup>

#### **G-IV Los prejuicios de nobleza de los criollos.**

Tampoco estaban exentos de estos prejuicios los mismos criollos. En un caso ocurrido en Buenos Aires, Juan Bautista Fernández de Agüero,<sup>4030</sup> alegó para eximirse del pago de los honorarios debidos a su médico Dionisio de Alvarado, el fuero o distinción de su linaje.<sup>4031</sup> De mi escrito no es evidente, se preguntaba Alvarado, "...que sólo cobro por el mérito de facultativo en la medicina, sin traer a consideración ni mi prosapia ni la de Juan Bautista?".<sup>4032</sup> En otro caso ocurrido en Buenos Aires, Clara Echenique,<sup>4033</sup> alegó también su fuero de nobleza.<sup>4034</sup> En Córdoba, Francisco Suárez de Salcedo alegaba en 1782 fuero de nobleza.<sup>4035</sup> Y en un caso ocurrido en Catamarca, Bartolomé Suárez de Jixena,<sup>4036</sup> alegó para eximirse del arresto que solicitara el Juzgado de Primer Voto --a instancias de su acreedor y vecino de Salta, el comerciante peninsular Agustín de Zuviría y Marticorena--<sup>4037</sup> no sólo su condición de militar, sino también las excepciones o fueros que su condición de noble descendiente de conquistadores le otorgaba.<sup>4038</sup> En su descargo, el abogado de Zuviría, Antonio Francisco Mutis,<sup>4039</sup> sostuvo que era falso se hubiese desatendido la excepción o fuero de nobleza pues ella no aprovecha para los delitos "...porque en el mismo instante que se incurren deja de ser noble el que los comete".<sup>4040</sup> Tan generalizada llegó a estar la conciencia de la nobleza adquirida o privilegiada y la virtud propia que hasta se llegaron a publicar Anónimos acerca del tema. Los términos elogiosos de la virtud propia y no heredada en que está redactado el famoso Anónimo acerca de la Genealogía de los Tejeda, publicado por Levillier (1926), revelaría también que su autor no sería otro que un Tejeda mulato, probablemente "la célebre Eugenia de Tejeda",<sup>4041</sup> la misma que había desafiado a las damas cordobesas usando ropas de seda, alfombra y criada, y que mereciera por ello ser procesada y multada por el Cabildo de Córdoba.<sup>4042</sup>

#### **G-V El concepto de fuero de nobleza.**

También se distinguió en aquella época el concepto de fuero de nobleza según a que tipo de derecho se acudiera, y a que jerarquía dentro de la nobleza se tomara en cuenta. En cuanto a lo primero el concepto de nobleza variaba según que se atendiere al derecho divino o al derecho humano. Sebastián Alegre, vecino de Corrientes, alegaba en defensa de su hija la plebeya Francisca Antonia Alegre, humillada en el disenso judicial iniciado en 1791 por el Regidor Francisco Xavier de Casajús,<sup>4043</sup> contra el matrimonio de su primo y cuñado Manuel Antonio Casajús, que atendiendo al derecho divino se llama noble al que "...en el fuero interno sea más timorato de Dios y mejor cristiano", y atendiendo al derecho humano al que en el fuero externo monopolizara la fe pública por retener "...papeles documentados y revisados, cuando menos, por alguna Real Chancillería".<sup>4044</sup> No

concurriendo en ninguno de los dos estas últimas acreditaciones, Alegre concluía para baldón de Casajús, que "...o los dos somos plebeyos o somos nobles los dos".<sup>4045</sup> En cuanto a lo segundo, el concepto de nobleza variaba según se tratara de noblezas rústicas o de hidalguías. En un disenso ocurrido en Córdoba a comienzos del siglo XIX, el Cura y Vicario del Río III arriba, Lic. Benito Lascano, manifestaba que la nobleza de Dionisia Suárez, la madre de la novia, "...no me parece que es de aquellas que se confunden con las hidalguías".<sup>4046</sup> En otro llamativo caso suscitado en Mendoza por Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, contra su padre Fermín Martínez de Virgala,<sup>4047</sup> por oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros, acusada de tener sangre de mulatos,<sup>4048</sup> Virgala manifestaba que

"...Los Nobles sólo son los que descienden de solar o título, quiero decir, aquellos los que provienen de casa solariega con territorio en tierras fuertes de la Montaña, y los que se comprenden en los títulos de Duque, Marqués, Conde, y Visconde, como enseñan todas las leyes de la citada segunda Partida desde el título 20".<sup>4049</sup>

Igualmente eran nobles, según Virgala,

"...los Caballeros hijos Dalgos, Infanzones, y por particulares leyes los Doctores, Abogados, Militares, y constituidos en los empleos mayores del Real servicio en todas sus clases, los cuales son como he dicho, Nobles por privilegio, y con Nobleza solo personal que no trasciende a hijos, siendo esta la diferencia que se da entre los primeros, que gozan noblezas de sangre transcendentales a sus descendientes".<sup>4050</sup>

No había pues, para Virgala, fuera de los nobles mencionados otros nobles, de lo cual deducía que noble

"...no lo es mi Padre, aunque herradamente lo supone, ni tampoco lo fueron sus antepasados, porque no han tenido otra calidad que la que tiene dicho mi padre".<sup>4051</sup>

Tampoco era noble su padre por detentar un cargo en el Cabildo, por cuanto:

"...todos deben entender, que los empleos de república, que se sirven, como los cargos concejiles, no ennoblecen sino es mientras dura el ejercicio, de otro modo se seguiría el inconveniente de ser Noble, aún contra las propias Leyes, todos los plebeyos, y Artesanos, a quien por novísimas disposiciones reales se les ha declarado hábiles para obtener los cargos concejiles como generalmente se acostumbra en todo el Reino español".<sup>4052</sup>

De esta cruda lógica, Virgala concluía reconociendo con notable humildad para la época,

"...que mi calidad no excede por lo que respecta a mi Nacimiento del estado general, y por lo que mira al ejercicio, que es matar carnes, que vendo públicamente en esta Ciudad, el de un plebeyo, que no reconoce más, que el ser hijo legítimo, y de unos Padres Españoles, y vecinos honrados del estado Común de este Pueblo".<sup>4053</sup>

Asimismo, en San Juan, cuando en 1794 se llamó a elecciones de nuevos capitulares, el Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes Juan Manuel Castro

Carreño,<sup>4054</sup> y sus adeptos, enfrentaron al candidato del partido beato o pelucón,<sup>4055</sup> Juan Miguel de Oro y Cossio,<sup>4056</sup> con un joven sanjuanino, de 27 años, doctorado en Chile, llamado Luis Estanislao Thello,<sup>4057</sup> quien también desempeñaba el empleo de Administrador de la Real Renta de Tabacos. Sin embargo, la candidatura de este último, debido a sus ignotos orígenes genealógicos fue impugnada por los beatos.<sup>4058</sup> La facción beata estaba dirigido por Francisco Borja Vicentelo de la Rosa,<sup>4059</sup> y lo formaban los cabildantes Lucas Robledo,<sup>4060</sup> José Clemente Riveros,<sup>4061</sup> y Pedro Carril.<sup>4062</sup> Este grupo era el económicamente más poderoso no sólo por poseer extensos viñedos, sino también por ejercer el comercio con Buenos Aires. Sin embargo, con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778), esta facción vio erosionado su poder económico, dando lugar al crecimiento de otro sector social, al cual pertenecía Thello, que no tardó en manifestarse en el Cabildo.

Los tres firmantes de la impugnación de Tello solicitaban en términos más propios de un estercolero que de un ayuntamiento, se les permitiese exponer que en el referido Dr. Thello

"...concurría la de ser deudo suio, por traer su origen por línea masculina del [Comisionado] Bartholo Thello, su lejítimo padre, que fue concebido de ilejítimo aiuntamiento en Doña Isidora Robledo, tía carnal del expresado rexidor Alcalde Provincial Don Lucas Robledo, con padre ignorado que no podía designar la referida madre entregada en aquella circunstancias al libertinaje y abandonada a una irregular prostitución".<sup>4063</sup>

Los propios cabildantes citados, en carta dirigida al Gobernador Intendente le manifestaban que aunque se dijera que Bartolo era hijo de Doña Isidora Robledo, como mujer entregada al libertinaje, no habría podido designarle padre. Habiendo asumido por un instante que su padre hubiese sido hijo de dicha Isidora se preguntaban los cabildantes "¿con quien estubo desposado esta señora?". Ella tenía "...siguiendo el sentir que apetecen sus protejientes a Thellos, Luceros, Barrosos, y una multitud de descendientes por haber contraído más de unas bodas?".<sup>4064</sup> La consecuencia forzosa de lo que los antropólogos hoy llamarían una poliandria era en ese entonces "...los que la ley llama hijos mancebados o adulterinos, ¿si es de los primeros es de peor condición que siendo de los segundos, y estos como de dañado y punible ayuntamiento biles según derecho".<sup>4065</sup> Más aún, los partidarios del Dr. Estanislao querían a toda costa hacer a su abuelo Tomás hijo legítimo de Don Juan Thello de Meneses. Sin embargo, la partida de bautismo del abuelo Tomás probaba la necedad de los partidarios de su nieto, pues ella demostraba que el citado Tomás, al igual que su hijo Bartolomé, también había sido hijo natural, en este caso del referido Don Juan Thello de Meneses y de madre no conocida.<sup>4066</sup> En cuanto a la madre del Dr. Estanislao, Doña Clemencia Lagorio, muy probablemente hija del comerciante Juan Bautista Lagorio, los cabildantes denunciaban que era casada en segundas nupcias con Lucas Benegas

"...de calidad conocida por tan inferior que no hay bileza con quien no esté mezclada, y de aquí es que con un padraastro de esta naturaleza al lado no habrá compatriota que se glorie de tenerlo por candidato".<sup>4067</sup>

Haciéndose eco finalmente de las infames denuncias del patriciado sanjuanino, el Gobernador de Córdoba Nicolás Pérez del Viso emitió un auto confirmando entre otras designaciones la elección de Don Juan Miguel de Oro y Cossio en la vara de Alcalde Ordinario y desechando la de Tello.<sup>4068</sup> En el recurso de apelación del Auto proveído por

el Gobierno de Córdoba, José Ignacio Maradona, José Ortiz Santibañez, Francisco Gregorio Blanco Jofré y el Dr. Estanislao Tello, representados por el Dr. Mariano Zavaleta,<sup>4069</sup> interpusieron cinco testigos, de los más "...condecorados, antiguos y apreciables [de San Juan]...buscados a elección del mismo Juzgado", que instruyeron una información donde todos se encontraron contestes en que Don Bartolomé fue hijo natural de Don Tomás Tello y de Da. Isidora Robledo procreado en tiempo que estos se mantenían solteros, y que así Dn. Tomás, como Da. Isidora, Dn. Bartolomé, y sus descendientes habían sido "...tenidos y reputados por nobles y limpios de toda mala raza, por lo que han obtenido los primeros empleos de la República".<sup>4070</sup> En efecto, Dn. Tomás había sido Alcalde ordinario de primer voto y fue quien hizo en 1756 la jura y aclamación pública de Don Fernando VI, Don Bartolomé había sido Alcalde de Aguas varios años, y de la Santa Hermandad de dos para tres años y después de 1764 la Real Audiencia había depositado en él la jurisdicción ordinaria "...en cuia administración continuó 6 para 7 años que se mantuvo suspenso el Cabildo".<sup>4071</sup> De esta forma desmintió el Dr. Zavaleta los documentos con que Robledo quiso conspirar contra su misma sangre, comprometiendo la ascendencia del Dr. Tello, "...levantando fantasmas de deshonor contra los propios suyos, cuia memoria debiera respetar".<sup>4072</sup> ¿A quien no escandalizará este proceder? se preguntaba el Dr. Zavaleta:

"...¿A quien no horroriza el empeño con que la malediciente detracción de Robledo saca del sepulcro las yertas cenizas de su tía carnal para llenarlas de abominación y vituperio? ¿Quien creará que el celo y conveniencia del bien público inflamarán a Robledo para convertirse contra su propia sangre tratando de prostituta a su tía y apellidando a su primo Don Bartolomé con el epíteto de manera adaptable tan sólo según el claro tenor de las leyes a aquellos hijos nacidos de mugeres que viven en casas públicas entregados al comercio ilícito de sus carnes con unos y otros?".<sup>4073</sup>

Despechados Robledo, Carril y Riveros, por que Tello no adeudando dineros a la Real Hacienda, desempeñando el empleo de Administrador de la Real Renta de Tabacos, y ostentando el grado de Doctor, egresado de la Universidad de San Felipe en Chile, había obstaculizado el objetivo de designar a Oro sin oposición alguna, "...han ofrecido por cosa de muy poco momento injuriar la memoria de los muertos para sacar de las entrañas de ella defectos que oponer a los vivos que por no ser de su facción emulan y apetecen arruinar".<sup>4074</sup> No conformes con averiguar el origen del padre del Dr. Thello, Robledo y compañía se propusieron también averiguar el origen de su abuelo. Como las partidas de bautismo expedidas por el Cura y Vicario Eclesiástico callaban la identidad de la madre de su abuelo, Zavaleta concluía que el motivo de dicha sospechosa omisión debió haber sido el mismo por el cual se silenció también en la partida respectiva a Da. Isidora Robledo. Pero acaso, se preguntaba Zavaleta ¿el hijo no sigue la condición y calidad del padre?. El hecho de poner entre las partidas de españoles bautizados a Don Tomás "¿no convence que se le tuvo y reconoció por español? ¿el hijo natural cual lo fué Dn. Tomas Tello del Dn Juan no goza de la nobleza e hidalguía de su padre?".<sup>4075</sup> Luego, si todo esto era cierto e incuestionable y si Don Tomás y Don Bartolomé su hijo habían vivido en la posesión de bien nacidos distinguiéndolos la Ciudad y los Tribunales con los primeros empleos de la República

"¿que han pensado adelantar Carril, Robledo, y Riveros con las fés de bautismos de aquellos, contra la posesión en que también se halla el Dr. Tello nacido de legítimo matrimonio, y condecorado con el grado de Doctor después que acreditó suficientemente su origen, idoneidad, y limpieza de toda mala raza?".<sup>4076</sup>

En la refutación de esta expresión de agravios, el Dr. Alexo Castex, en representación de Robledo y Carril, manifestaba que la candidatura del joven Tello obedecía a las recomendaciones del Regidor y Alférez Real José Ignacio Fernández de Maradona.<sup>4077</sup> Maradona pretendía, según Castex, elevar repentinamente a Thello al grado de Alcalde, "...sin pasar por los otros empleos menores del Cabildo que suele ser la escala que ha adoptado la política de los Cabildos de conformidad a los sentimientos mas claros de la razón".<sup>4078</sup> Como era de suponer, pese a que Zavaleta planteó también el parentesco existente entre el elector Carril y el elegido Oro, el partido beato finalmente triunfó, y Oro asumió la alcaldía.<sup>4079</sup> Del Thello que había protagonizado aquel célebre conflicto capitular nada sabemos, salvo que casó con María del Tránsito Videla,<sup>4080</sup> y que en tiempos de Rosas, fiel a su ideario liberal, tuvo que emigrar, radicándose en Los Andes, Chile.<sup>4081</sup>

## **G-VI Las nociones de plebe y de oficio infamante.**

Amén de la noción de nobleza es preciso también estudiar la noción de plebe, conjuntamente con la de oficio infamante. Era usual en el mundo colonial impugnar en los Cabildos a los testigos de condición plebeya. En 1795, Nicolás Villafañe y Sánchez,<sup>4082</sup> se presentó al Cabildo de La Rioja para impugnar por plebeyos en un litigio a los testigos presentados por José Antonio Mercado "...como si el derecho excluyese de poder testificar a los que no son de condición noble, o como si en estos estuviese tan sólo depositada la fé".<sup>4083</sup> En Corrientes, en tanto, aunque aún pesaba el origen geográfico del nacimiento, según que se fuere patricio o europeo, para Maeder (1981), la diferencia social y económica entre los mismos peninsulares o españoles europeos, según que fueren nobles o plebeyos, era lo determinante de su condición social.

Estos atavismos nobiliarios no eran propios sólo de La Rioja y Corrientes sino que se habían generalizado en todas las provincias. Pero también estos casos revelan que en la conciencia de las oligarquías pre-revolucionarias de las provincias fueron desarrollándose unos anticuerpos suficientemente sólidos como para elaborar discursos con que contrarrestar el fortalecimiento del absolutismo borbónico.

## **G-VII La barbarización de los patriciados rurales.**

En regiones donde predominaba una estructura familiar patriarcal y un sistema clientelístico y patriarcal de poder capitular (cabildos), y donde prevalecía una acentuada red de parentescos, como La Rioja, se daba también la existencia de una barbarización de los patriciados rurales. Entre las evidencias del espíritu y mentalidad patriarcal he logrado detectar también en La Rioja el no se sabe cuán generalizado caso protagonizado por Don Nicolás Bazán.<sup>4084</sup> Este era el caso típico de quien no sólo se consideraba dueño de haciendas y cargos públicos, sino también de quien se consideraba acreedor a una suerte de derecho de pernada de cuanta mujer humilde existiera en el pago.<sup>4085</sup> Nicolás Bazán, era con seguridad nieto primogénito de Nicolás Bazán de Tejeda, quien a su vez era hijo del Corregidor Juan Gregorio Bazán de Pedraza, fallecido en La Rioja en 1692, y de Mariana de Tejeda y Guzmán.<sup>4086</sup> En el proceso iniciado con motivo de la denuncia formulada en 1798 por María Santos Narvona contra Nicolás Bazán, el testigo Rudecindo Carbajal manifestaba

"...que sabía y le constaba que el expresado Bazán, no tenía otro ejercicio de día y de noche que el de solicitar mujeres para sus sensualidades pues jamás le había visto emprender el menor trabajo para su manutención y que igualmente le consta por haberle oído repetidas veces a dicho Bazán y a otros muchos que no tenía otro empeño ni gusto que el romper la virginidad de las más criaturas y asimismo le consta vive amancebado con varias mujeres de este partido".<sup>4087</sup>

Justamente por ser Santiago del Estero y el Paraguay, a fines del siglo XVIII, provincias también marginadas del circuito mercantil más intenso, los prejuicios y atavismos raciales de una oligarquía o patriciado local que presumía poseer una nobleza legítima se vuelven cada vez más virulentos, al extremo de dividir a las familias mismas, reprimiendo a los díscolos con medidas punitivas. En vísperas de la revolución, en febrero de 1809, José Ramón Bravo de Zamora le pide al Virrey Cisneros desde Santiago del Estero el esclarecimiento de su honor y linaje que su hermano Juan Gregorio ha pretendido manchar al contraer matrimonio "...con una mulata de su casa", solicitando al mismo tiempo que debería tachársele el "Don" de su nombre.<sup>4088</sup> Asimismo, en 1805, el Comandante de Villa Rica Don Miguel Martínez desheredó a su hija por haber permitido que su nieta se casara con el nuevo Regidor y Defensor de Menores José Antonio Talavera, un mulato "calificado" y de ascendencia conocida, pues según el encomendero Ramón Duarte, el que querellaba al Cabildo de Villa Rica por su mal gobierno, "...[la] abuela del tal Regidor fué casada con un indio de mi encomienda y la madre hija de un esclavo mío".<sup>4089</sup>

## **G-VIII La condición social de plebeyo.**

No sólo la pertenencia a una de las castas era fuente de discriminación matrimonial a través de los disensos judiciales, sino también la condición social de plebeyo. El ejemplo más notorio en ese sentido fue el disenso judicial protagonizado por la familia Casajús. El Regidor Francisco Xavier de Casajús y Ruiz de Bolaños, anteriormente citado, marido de su prima hermana Rosa de Casajús y Pessoa Figueroa, a fin de evitar "...aquella dolorosa confusión de las familias bulgares con las de primer orden de cada ciudad" cuestionó en 1791 el matrimonio de su cuñado Manuel Antonio Casajús con la plebeya Francisca Antonia Alegre,<sup>4090</sup> pues "...aunque no tengan mala raza y sean españoles, son conocidos, tenidos y reputados por plebeyos".<sup>4091</sup> Para Don Francisco Xavier la preeminencia social de la que gozaba su familia les venía por derecho divino, pues alegaba que su prima Margarita Pessoa y Figueroa, madre del novio, "...no puede renunciar de aquellos derechos de nobleza e hidalguía con que el autor de la naturaleza ha caracterizado nuestras familias".<sup>4092</sup> Si de sus cenizas pudiera volver Don Sebastián de Casajús, padre del novio, "...como hombre de tanto honor toda su sangre [se] convertiría en veneno contra este hijo ingrato, que lo crió como si fuese hijo de algún Príncipe".<sup>4093</sup> Tampoco se le ocultaba a Don Francisco Xavier, que pese a que Sebastián Alegre "...trabaja sumamente en ennoblecerse aglomerando parientes que jamás lo han sido, como los Sánchez Moreno y los Añasco" se hallaba casado "...con una mujer cuya abuela materna, fue y es hasta ahora reputada por muy plebeya".<sup>4094</sup> En cuanto a Don José de Añasco, Gobernador Interino de Misiones,<sup>4095</sup> padre de Don José Ignacio Añasco, casado con hija de Doña Rosa Ramírez, citado por Alegre como pariente, Casajús revela que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste último lo trató a Añasco de mulato. Más aún, cuando su antecesor en la Gobernación de Misiones, el Tte. Cnel. de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,<sup>4096</sup> fué reemplazado por Añasco, Casajús nos cuenta que Riba Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar cuenta al Rey por haberle hecho suceder en dicho

ministerio a un mulato".<sup>4097</sup> Por su parte, Sebastián Alegre, por necesidad o consubstanciado con la misma ideología de su impugnador, mandó levantar una Información de Limpieza de Sangre, y adujo en la misma en su defensa, que el Regidor Casajús

"...ha intentado hacerme grave injuria constituyéndome en la Plebe [cuando] mi nobleza patricia es similitudinaria a la suya,...y siendo equipolentes los públicos empleos que tanto él como mi linaje ha administrado...es de consecuente la violencia del pensamiento del consabido Regidor".<sup>4098</sup>

Finalmente, luego de un extenso tramitar y apelar, el juez declaró que era injusto e irracional el disenso invocado por Casajús, y al día siguiente de la sentencia la pareja impugnada celebró su tan ansiado matrimonio, dejando en su familia una secuela de desavenencias que muy probablemente sólo la revolución de independencia habría subsanado.<sup>4099</sup>

## **G-IX Los oficios infamantes.**

Ciertos oficios, como los de carnicero o verdugo, tenidos por infamantes, solían ser estigmatizados por aquellos cabildantes más antiguos que se resistían al avance de nuevas capas sociales. En Corrientes el Alcalde Antonio Hidalgo Casajús,<sup>4100</sup> señalaba

"...que puede suceder de que a la sombra de la distancia por la informalidad con que se proceda en el presente escrutinio se aventure la administración de justicia, en sujetos...plebeyos, razas de carniceros, berdugos, gitanos, judíos, y expósitos...con agravio de los beneméritos y del juicio del público".<sup>4101</sup>

Asimismo, Hidalgo Casajús, acusaba a dos europeos candidato a alcaldes, de plebeyos. A José A. Peñalver de "...haber servido de lacayo y tener negocio de trucos y lotería", y a Manuel Varela y Montoto de "...ser mercader que mide por sí [mismo], sin tener factor ni criado".<sup>4102</sup> A su vez el vecino de Corrientes Diego Benítez y Robles replicaba que el mismo argumento podía retorsérsele al Alcalde Casajús pues "...sus Antepasados de Vd. fueron originarios de la Europa deviando Vd. consentir en este principio sopena de una abjecta y vaja extracción".<sup>4103</sup> De aquí concluía Benítez

"...¿puede Vd. venir de carniceros, verdugos, gitanos? La Ejecutoria de sus Mayores no se deja ver archivada en los Protocolos Públicos: ¿Luego es Vd. indigno de los cargos que ha obtenido e incapaz de obtenerlos en lo sucesivo?".<sup>4104</sup>

Semejantes estigmas circulaban también por San Luis. En las elecciones de 1797, el Alcalde Provincial y el Regidor Fiel Ejecutor no se conformaron con los dos votos que se habían dado a Agustín Palma,

"...por haberse desempeñado como cortador en la carnicería pública el primer año que ella se estableció, agregando que sus hermanos y tíos han sido y son matadores de ganado y también se ignora la sanguinidad de la esposa".<sup>4105</sup>

En Buenos Aires, el Escribano Pedro Núñez descalificaba en 1776 al difamador Juan de Osorio por ser "...un pobre hombre que vino de soldado de Marina en el Navío El Asia, de que se desertó, y se fué a poner pulpería, comerciando en sebo y grasa".<sup>4106</sup> Medio siglo más tarde, el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, informaba al Consejo de Regencia, en

vísperas de la Revolución, que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, "...solamente concurrieron doscientos y de estos muchos pulperos algunos artesanos, [todo] en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre".<sup>4107</sup> También en Tarija, cuando en 1778 el Cabildo impugnó a José Antonio Arce,<sup>4108</sup> íntimo amigo del Gobernador de Armas Luis Hurtado de Mendoza,<sup>4109</sup> lo hizo afirmando ser "...sujeto desacreditado por su obscura y criminal extracción".<sup>4110</sup> El Maestre de Campo Juan de Echalar,<sup>4111</sup> y Gregorio Núñez, vecinos de Tarija, afirmaban en 1778 que José Antonio Arce,<sup>4112</sup> era

"...sujeto nacido de público y dilatado adulterio como parece, contraproducentemente, de la certificación de fs.29 del 5o. cuaderno, trae según el dicho del Real Profeta el error y la falsedad, por herencia desde el vientre de su madre, y ha vivido siempre resentido de que mi parte no se haia interpuesto con algunos capitulares, para hacerlo Alcalde, lo que han repugnado por su espuriedad escandalosa, y por su genio altivo, inquieto y desvergonzado".<sup>4113</sup>

Un cuarto de siglo más tarde, en 1803, la realidad de Tarija no había variado, pues los Regidores Benito López, Juan Díaz Chaves, Francisco Ruiloba,<sup>4114</sup> y José Báñez de Reyes,<sup>4115</sup> habrían obtenido los oficios que compraron "...con notorio vicio de ilegitimidad, y contra la forma prescripta por las leyes" al no haber justificado

"...si son naturales de estos Reynos cristianos, y de que raza o linaje, cuyos requisitos y calidades, que son de previa necesidad, y forma esencial, hallaron arbitrio para que se les dispensase, y supliesen con una fianza, al pretexto de la guerra".<sup>4116</sup>

Cuánto más pobre era la familia patricia en cuestión, más frecuente era la necesidad de implementar recursos judiciales, como el disenso matrimonial, fundado en la Real Pragmática de Matrimonios, para impedir el descenso social que una unión desigual del punto de vista socio-étnico podía traer aparejado.<sup>4117</sup> Es en ese sentido que he hallado en la sociedad cordobesa dieciochesca una familia paradigmática, la De las Casas. Pueyrredón (1958) menciona los casos de Josefa de las Casas y Funes,<sup>4118</sup> que se opuso por motivos étnicos al casamiento de su hija Dolores con José Hermenegildo López,<sup>4119</sup> y al caso de Petrona de las Casas y Arrascaeta, sobrina de la anterior, y prima hermana de un sobrino de Dalmacio Vélez, que se opuso al casamiento del hijo de dicho sobrino, Patricio Álvarez y Zamudio, con Felipa Avendaño, por ser ésta, hija de madre india y padre plebeyo.<sup>4120</sup> En la defensa de su pretendida, Patricio exclamaba "...que aviéndome criado huérfano rodante y mendicante así entre la ciudad como fuera de ella, jamás me e reconocido por otra cosa [que plebeyo] en la estimación de las gentes".<sup>4121</sup> Y ahora, prosigue Patricio,

"...que llevado del agradecimiento que les debo a los padres de mi pretendida y el mucho afecto que a esta le profeso, tenía corrido una proclama para celebrar las bodas, sale suspendiendo estas una que dice ser mi tía por prima de mi finado padre".<sup>4122</sup>

En conclusión, del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que los estigmas arriba mencionados,

manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

## Capítulo II-C-9      **Estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y eclesiásticas**

### Índice

- H-I      Tradición historiográfica en materia de crisis étnica
- H-II.    Diversidad étnica del Virreinato.
- H-III    Infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo.
- H-IV    Impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles.
- H-V    Prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.

### **Introducción del capítulo II-C-9**

Amén de las impugnaciones o tachas de los candidatos a cargos concejiles, es nuestra hipótesis en este capítulo que las impugnaciones o tachas de los candidatos a becas, capellanías, plazas militares o alianzas matrimoniales, debieron haber contribuido a precipitar el fenómeno revolucionario.<sup>4123</sup> La mayoría de los padres que se oponían al matrimonio de sus hijos vivían angustiados por los efectos sociales que un matrimonio desigual desde el punto de vista racial podía desencadenar. La evidencia que confirmara el temor de una ascendencia indígena o africana podía ser verificada en el color de la piel. Y el temor de esta última en el tipo de cabello, el ancho de la nariz, y el grosor de los labios.<sup>4124</sup> En este trabajo nos proponemos analizar una serie de casos ocurridos en Potosí, La Rioja, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Paraguay, Santa Fé, Corrientes y Córdoba, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas étnicas intra-familiares, la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.

Si bien somos conscientes de la dificultad de separar el mestizaje de la ilegitimidad, en este trabajo nos hemos reducido a indagar el rol cumplido por las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles y en otras instituciones como la milicia y el clero. Para estudiar estas impugnaciones hemos realizado algunos cálculos demográficos y hemos recogido una veintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>4125</sup>

### **H-I      Tradición historiográfica en materia de crisis étnica**

Las interpretaciones Marxistas de las diferencias raciales, sostuvieron que el progreso socioeconómico y la movilidad social consiguiente de las minorías étnicas no los llevaba necesariamente a una progresiva asimilación. Sin embargo, las interpretaciones ecologistas de las diferencias raciales, impregnadas de Darwinismo social y ecologismo cultural, sostuvieron que el progreso socioeconómico y la movilidad social consiguiente de las minorías étnicas debiera llevarlas necesariamente a una progresiva asimilación en la sociedad anfitriona.<sup>4126</sup> La genealogía del concepto Marxista de lucha de clases remonta sus vínculos de semejanza y filiación a los de guerra de castas, vigente en los discursos escolástico e iluminista.<sup>4127</sup> Pero la introducción del concepto Marxista de modo de producción permeó toda la trama conceptual con una innovación ausente en los discursos anteriores. Por el contrario, los estudios fundados en el análisis sociológico desarrollados más luego por la escuela funcionalista juzgaron a las sociedades como sistemas cuyo funcionamiento depende de sostener un equilibrio en el flujo total de demandas y recursos entre el sistema, sus subsistemas y su entorno.<sup>4128</sup> De aquí que cualquier perturbación que afecte gravemente el equilibrio de los flujos de demandas y recursos en una sociedad, deja a sus integrantes en un estado de incongruencia o inconsistencia de status (Merton, 1949; Lenski, 1954), y a la sociedad en un estado de disfunción (Johnson, 1966) o desequilibrio social (Hagopian, 1974), propenso a los cambios revolucionarios. Finalmente, mientras los primeros estudios fundados en el análisis estructuralista, desarrollado por los asimilacionistas (Gordon, 1964; Hechter, 1971; y Bonacich, 1973), priorizaron en la noción de etnicidad los contenidos culturales, sosteniendo que las inter-acciones y aculturaciones precedieron en el tiempo a las asimilaciones,<sup>4129</sup> los últimos enfoques (Smith 1981; Horowitz, 1985; y Van Den Berghe, 1981) enfatizaron la forma politizada, en la que las segmentaciones y movimientos étnicos han sido vistos como resultado de los mismos procesos de modernización.<sup>4130</sup>

El punto de vista convencional sostiene que la congruencia de status crea consenso y promueve la estabilidad y el conservadurismo político, y que por el contrario la inconsistencia o desajuste de status crea tensión y promueve inestabilidad y liberalismo político, o alternatively, tal como Lenski (1954) lo sugirió, extremismo político.<sup>4131</sup> La clásica tesis de Lenski, argumenta que la inconsistencia de status tendrá consecuencias políticas sólo cuando comprenda la suma de diferencias de status adscriptos (raza, hidalguía, legitimidad, estado jurídico de esclavitud o servidumbre, nacionalidad, riqueza y parentesco heredados, edad) y adquiridos (nobleza y legitimidad adquiridas; educación, autoridad, riqueza y parentesco adquiridos). Más aún, la tesis de Lenski se aplica sólo a una combinación específica de un bajo status adscrito y un elevado status adquirido. No importa cuán bajo nace uno en las escalas de status adscrito, si una persona puede alcanzar una consistencia de status relativa mediante la sola movilidad individual, no pretenderá cambio sociopolítico alguno. De aquí que su único recurso --en caso de que quiera zafarse de su inconsistencia de status-- será impedir el descenso social o buscar el ascenso social a través del sólo esfuerzo individual.

Recientemente, para Zimmermann (1978), la dicotomía de las variables adquiridas y adscriptas debe ser reemplazada por una perspectiva más dinámica (continua) donde las previas variables adscriptas puedan, al menos en parte, devenir el carácter de variables adquiridas. Así, por ejemplo, dado que en las postrimerías del período colonial la mayor parte de los criollos veía que algunos status (tal como el de ciertos cargos políticos, militares y eclesiásticos) eran imposibles de alcanzar, sin haber nacido hidalgo, hijo mayor, y en España, concluimos que el atributo de la autoridad en la América colonial Borbónica, a diferencia de Europa y de la colonización Habsburga, había devenido en un status

adscrito y no adquirido. De ahí que las situaciones de inconsistencia de status podían haber derivado en deseos de cambio político. Si a ello agregamos que cuando los criollos en ascenso padecían de un status adscrito subalterno (raza, nacionalidad, minoridad, ilegitimidad, bastardía, desheredamiento) --que era esencialmente inmodificable a través de la movilidad individual-- la inconsistencia de status resultante no podía resolverse sino mediante un cambio político revolucionario.

Posteriormente, otros discursos historiográficos, en los cuales se inscribieron varios investigadores Latinoamericanistas, propusieron la existencia de una relación entre clase social y segregación étnica donde el capital comercial habría impulsado a las cerradas sociedades de casta a un sistema abierto de clases.<sup>4132</sup> La reducción relativa de la distancia entre las castas sería prueba suficiente de la vigencia del proceso de movilidad social ascendente. ¿Transitarían las castas cerradas de la sociedad campesina andina un proceso hacia un sistema abierto de clases con la sola presencia del mercado y el capital comercial? Contestar afirmativamente conduciría, según Golte y la Cadena (1983), a resultados erróneos, pues la formación, amplitud y dinamismo de los mercados de mano de obra rural se hallaba frenada no solo por la persistencia del modo de producción campesino o parcelario sino también por la persistencia del modo de producción comunal o de subsistencia.<sup>4133</sup>

De las dimensiones o variables socio-étnicas de la homogamia (igualdad étnica y social), regla matrimonial básica en el mundo colonial, al menos tres de ellas: la raza, el status y el lugar de nacimiento, eran para McCaa (1984) mensurables. Sin embargo, en su momento, Arcondo (1973) nos advirtió, que la estratificación y diferenciación étnica y social perdía vigencia en tiempos de depresión, permitiendo la incorporación o integración de segmentos étnicos y sociales que hasta entonces no participaban, pues cuando sus miembros estaban escasos de recursos como para montar dotes y arras, y no conseguían casar "bien" a sus hijos, aceptaban resignadamente matrimonios desiguales o heterógamos, o bien los entregaban a algún convento con los gastos consiguientes. En tiempos de expansión comercial o de paz entre las metrópolis centrales, era mayor el número de peninsulares que arribaban a estas playas, y por ende, mayor era la posibilidad que tenía el grupo peninsular de perpetuarse a sí mismo, y mayor la oportunidad de los padres de familia criollos de casar "bien" a sus hijas.

Por el contrario, en tiempos de guerra, cuando no arribaban peninsulares a las colonias de América, más inestable se volvía el grupo peninsular, y más posibilidades matrimoniales y de ascenso se le ofrecían a los criollos pobres. Por casar "bien" a sus hijos se entendía en ese entonces --y me atrevería a decir que en La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes, esa tradición aún hoy perdura más virulentamente que en las provincias centrales-- desposarlos homogámicamente, es decir con otros miembros de la elite de igual calidad étnica y social. Aquellas familias de la elite que no poseían bienes como para constituir dotes respetables, pero sí contaban con una cuota de poder político considerable dotaban a sus yernos o parientes políticos con cargos electivos en los Cabildos, o con cargos en los organismos estatales o para-estatales (Temporalidades, Correo, Renta de Tabaco, Milicia Provincial, Capellanías y Obras Pías, Cabildo Eclesiástico, Santo Oficio, etc.). Pero como justamente en ese entonces, por su corta dimensión numérica, era difícil hallar en el mundo colonial pareja homogama que no fuera un pariente (con quien para casarse era preciso obtener dispensa eclesiástica), la más de las veces la desigualdad entre los miembros de cada pareja era vencida sólo por la vía más expeditiva del rapto simulado o la seducción. A los miembros de la elite, cuyas hijas

hubieren sido seducidas, les restaba --a juicio de Martínez-Alier (1974), que analiza los casos de la Cuba colonial-- sólo tres cursos de acción. Si el seductor era igual en honra y raza, el matrimonio era la solución adecuada. Si era inferior en honra y raza, la acción apropiada era una demanda criminal, y si superior, la familia de la seducida debía resignarse a la vergüenza pública.<sup>4134</sup>

## **H-II La diversidad étnica del Virreinato.**

En principio, la diversidad étnica del Virreinato del Río de la Plata variaba notablemente de una provincia a otra, y de un pueblo al otro, alterándose de esa forma la repercusión política del mestizaje. Los descendientes de españoles nacidos en América, conocidos como criollos, eran en gran parte blancos. Aquellos que no eran blancos puros, necesariamente procedían de la consiguiente mezcla con los miembros de las castas. En base a un padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927), dotado de una información valiosísima, hemos logrado para ese año elaborar el ranking del mestizaje, con los porcentajes de los miembros varones adultos de las castas sobre el total de la población masculina adulta existente en las cabeceras de las provincias del actual territorio argentino. En efecto, encabeza el ranking de posiciones Santiago del Estero con el 104%, seguida por Catamarca con el 83%, Tucumán con el 53,5%, Jujuy con el 41,3%, Córdoba con el 28,5%, Salta con el 13,5%, y finalmente La Rioja con el 6,7%. La ciudad de Córdoba contaba con 988 miembros de las castas, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 28,5%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 1770 miembros de las castas sobre un total de 2139 varones adultos, o el 83%. La ciudad de Salta, contaba con 463 miembros de las castas, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 13,5%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, alcanzaba a los 620 miembros de las castas, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 53,5%. La ciudad de La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 52 miembros de las castas, sobre un total de 772 adultos varones, o el 6,7%. Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 331 miembros de las castas, sobre un total de 318 varones adultos, o el 104%. Jujuy contaba con 266 miembros de las castas, sobre un total de 644 varones adultos, o el 41,3%. Finalmente, Mendoza, en base a una "indicación detallada" de su vecindario, efectuada en agosto de 1802 por el Pbro. Domingo García, publicada por Caillet-Bois (1930), hemos logrado determinar para ese año que Mendoza contaba con el 61% de miembros de las castas, es decir tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos y 2.301 criados libres, por sobre un total de 13.382 personas.<sup>4135</sup> En Córdoba, las Comunidades indígenas operaban como laboratorios de mestizaje. Villa del Rosario, Nono, Quilino y Tulumba fueron lugares donde la promiscuidad entre indios y españoles era la regla más que la excepción.<sup>4136</sup>

## **H-III La infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo.**

Cabe entonces preguntarse en este trabajo si en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata --alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- sus cabildos fueron infiltrados por vecinos de origen mulato o mestizo. Fue en sus Alcaldías, así como en sus Tenientazgos, sus jerarquías militares y sus Vicariatos,<sup>4137</sup> donde los mestizos minarían la estructura de poder de la sociedad colonial.<sup>4138</sup> Los casos más notorios de bastardización estatal, provocados por la

incorporación de Ediles, Gobernadores y Vicarios mestizos o mulatos, se registraron en Potosí, Tarija, La Rioja, San Juan, Salta, Córdoba, Corrientes, Misiones, Asunción del Paraguay y la mayoría de las villas fronterizas (Orán, San Carlos, Río Cuarto, Chascomús, San Miguel del Monte, Belén, Batoví y Goya).

#### **H-IV Las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles.**

La secular lucha por los asientos concejiles arrancaba por lo general con la escusa de la existencia de divergencias fundadas en la línea del color. La lucha contra el etnocentrismo,<sup>4139</sup> para facilitar el acceso de los marginados a la elite o, lo que es lo opuesto, la utilización del estigma racial para impedir el acceso a la misma, se dio entre otros lugares en Salta y Mendoza. En Salta, según declaró en 1795 su Gobernador-Intendente, el Alcalde de segundo voto Roque Ávila no era natural de dicha Provincia, si no de la de Córdoba, agregando con acidez que "...aunque no tengo noticia de su familia, le supongo de noble estirpe, pero su porte es tan oscuro, que hace cerca de veinte años reside insociable en una estancia, sirviéndole de albergue un rancho".<sup>4140</sup> Y en Mendoza, la familia de Ladrón de Guevara se hallaba vinculada marginalmente a las familias que Comadrán llama las "tres casas reinantes" de Cuyo. Sus orígenes se remontaban a la conquista de Cuyo, y por tanto padecía, como en los casos de los Martínez en Corrientes, de los de las Casas en Córdoba, de los Bravo de Zamora en Santiago del Estero, o de los Peñaloza en La Rioja, de un alto grado de estima por su abolengo o alcurnia.<sup>4141</sup> En un juicio donde se solicitaba prestar consentimiento al matrimonio que José García intentaba contraer con Gertrudis Ladrón de Guevara,<sup>4142</sup> su hermano Santiago preguntaba en el interrogatorio establecido para examinar los testigos del caso

"...si saben que en aquella ciudad hemos sido siempre tenidos y reputados por Españoles limpios de toda raza, que nuestros padres han sido de las familias honradas y distinguidas de dicha ciudad sin que en ellos ni en sus ascendientes se haya considerado jamás nota alguna que desdiga de un verdadero lustre y distinción".<sup>4143</sup>

Por el contrario, para el caso del pretendiente José García,<sup>4144</sup> Guevara se preguntaba

"...si saben y les consta que tanto Eusebio Rodríguez como su mujer Antonia Puebla, un hermano de esta Nicolás Puebla, y la hija de aquellos María Gregoria Rodríguez Puebla, madre de José García han sido siempre tenidos y reputados por mulatos en Mendoza y lo son hasta el día de fama pública".<sup>4145</sup>

Asimismo, Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, demanda a su padre Fermín Martínez de Virgala,<sup>4146</sup> por oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros, acusada de tener sangre de mulatos.<sup>4147</sup>

Cuando el seductor era un indio y la seducida una mujer noble, el escándalo era mayúsculo al extremo de convertirse en mito o leyenda. La única hija del matrimonio de Santiago Allende y Loza y Engracia Arze fue María Magdalena Allende y Arze, la cual fue raptada por un esclavo zambo llamado Bamba, con el cual tuvo varios hijos. Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena visitó a su padre con sus hijos mestizos no fue recibida por éste. Más luego, habiendo enviudado y perdido a sus hijos, enloqueció de dolor. Fue hallada en la sierra cordobesa luego de muchos años, y falleció en el Convento de las Catalinas. Su drama fue inmortalizado por Ataliva Herrera (1944) en su poema

Bamba. En el folklore regional cordobés se la mitificó como un ave campesina apelada "la monjita".<sup>4148</sup>

En las provincias marginadas del circuito mercantil más intenso, los prejuicios y atavismos raciales de una oligarquía o patriciado local que presumía poseer 'limpieza de sangre' se vuelven a fines del siglo XVIII cada vez más virulentos, al extremo de dividir a las familias mismas, reprimiendo a los díscolos con medidas punitivas. En Santiago del Estero, en vísperas de la revolución, en febrero de 1809, José Ramón Bravo de Zamora le pide al Virrey el esclarecimiento de su honor y linaje que su hermano Juan Gregorio ha pretendido manchar al contraer matrimonio "...con una mulata de su casa", solicitando al mismo tiempo que debería tachársele el "Don" de su nombre.<sup>4149</sup>

La lucha contra el etno-centrismo y la implementación del estigma racial como mecanismos de defensa también fueron implementados por la oligarquía correntina. En un célebre caso protagonizado por Sebastiana Gonsález, en contra del matrimonio a celebrarse entre Juan Estéban Martínez --el que luego fuera suegro de Felipe Díaz Colodrero y Estéban María Perichón de Vandeuil-- y Francisca Hidalgo Casajús, Doña Margarita Martínez de Luján, madre del novio, impugnó las pretensiones matrimoniales de Sebastiana Gonsález, arguyendo que debían considerarse nulas las promesas dadas a ésta por su hijo. Lo contrario sería, inferir una injuria a su linaje en desdoro de su pureza, por ser aquella de inferior condición social e hija natural de un mulato conocido.<sup>4150</sup> A diferencia de las provincias del noroeste, que se hallaban incorporadas a una producción orientada esencialmente por el polo minero potosino y vivían hegemonizadas por quien corría con el grueso del comercio interior: la Compañía de Jesús; las provincias del litoral rioplatense lograron adquirir una considerable autonomía con respecto al aparato ideológico jesuítico. Salvo Córdoba, las sociedades mediterráneas no fueron capaces de generar una anti-élite semejante a la generada por la Provincia de Corrientes.

En cuanto a la Gobernación Militar de Misiones, el Regidor Francisco Xavier de Casajús,<sup>4151</sup> llegó a revelar que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste último lo trató a Don Carlos José de Añasco, Gobernador Militar Interino de Misiones,<sup>4152</sup> de mulato. Más aún, cuando su antecesor en la Gobernación, el Teniente Coronel de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,<sup>4153</sup> por no conformar al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, fue reemplazado en 1769 por Añasco, Casajús nos cuenta que Riba Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar cuenta al Rey por haberle hecho suceder en dicho ministerio a un mulato".<sup>4154</sup> En Chile, el conflicto étnico entre criollos y peninsulares se dio en mucho menor grado, por la inmensa mayoría de criollos existentes.<sup>4155</sup> Por el contrario, en Buenos Aires mismo, el conflicto étnico se redujo sólo a una lucha entre españoles de distinto origen geográfico.<sup>4156</sup> En tiempos del Gobernador Ceballos, el Escribano Pedro Núñez, se agravió del Regidor Juan de Osorio,

"...que porque gastó 200 o 300 pesos en comprar un Regimiento, pretenda ultrajar al género humano. El injuria a todo el Ilustrísimo Cabildo: el trata al Sr. Dn. Juan Manuel de Labardén con un tono de desprecio llamándole el Auditor de Guerra, y al Dr. Antonio Aldao, le rebaja el Doctor, el Don, y el Antonio llamándole solamente Aldao; quien es Osorio para semejantes atrevimientos?".<sup>4157</sup>

Y en tiempos del Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, el abogado José Vicente Carrancio acusó al Secretario de Vértiz e íntimo amigo del poeta Labardén, el criollo Dr. Antonio

Basilio Aldao y Rendón,<sup>4158</sup> de discriminar socialmente contra todos los peninsulares o europeos.<sup>4159</sup> Tiempo después, el Comandante de Milicias Miguel de Azcuénaga,<sup>4160</sup> cuñado del Virrey Olaguer y Feliú, en ocasión del ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794,<sup>4161</sup> "...soltó las riendas a su genio orgulloso y dominante; y corrió el velo a la saña de su corazón contra el Español Europeo".<sup>4162</sup> De esa forma, según lo expresa en su memorial de agravios Manuel Crespo, "...se vieron y experimentaron sonrojos, multas y prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados todos a sufrir y callar en aquel Gobierno".<sup>4163</sup>

En el Paraguay, en Villa Rica, como consecuencia del matrimonio del nuevo Regidor y Defensor de Menores, el mulato José Antonio Talavera, con una nieta del Comandante de Milicias Don Miguel Martínez, celebrado en 1805, y pese al cargo político ostentado por el desposado, el abuelo Martínez desheredó a su hija, la madre de la novia, fundado en el color de la piel de Talavera.<sup>4164</sup> Asimismo, según el encomendero Ramón Duarte, la abuela del Regidor que querellaba al Cabildo de Villa Rica por su mal gobierno, "...fue casada con un indio de mi encomienda y la madre hija de un esclavo mío".<sup>4165</sup> Y en Buenos Aires, el Escribano Pedro Núñez descalificaba en 1776 al difamador Juan de Osorio por ser "...un pobre hombre que vino de soldado de Marina en el Navío El Asia, de que se desertó, y se fue a poner pulpería, comerciando en sebo y grasa".<sup>4166</sup> Medio siglo más tarde, el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, informaba al Consejo de Regencia, en vísperas de la Revolución, que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, "...solamente concurrieron doscientos y de estos muchos pulperos algunos artesanos, [todo] en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre".<sup>4167</sup>

Por último, cuando en el postrer ocaso del gobierno español en el Río de la Plata, los cabildos sufrían agudas crisis políticas, el uso del estigma racial era el arma más usual y temible. En el caso de Córdoba, cuando en 1783 el Alcalde de Primer Voto Don Ambrosio Funes halló que el linajudo Alcalde Provincial Domingo Garay era culpable de un triple homicidio, la elite no se lo perdonó y comenzó a correr el rumor de su origen mulato. En efecto, el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fue hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la joven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual. Las circunstancias que rodeaban la personalidad de Garay, los respetos debidos a su empleo, las conexiones de su casa, que incluían al linaje de los Allende, formaban, al decir del Canónigo Gregorio Funes en carta al Virrey, "...un conjunto de cosas terribles a mi hermano, si su Dios y su Rey no fuese la única cosa que él teme".<sup>4168</sup> No eran infundados sus temores, pues apenas se verificó la prisión de Garay

"...empezó en esta Ciudad un murmullo de toda su parentela, que nos llenó de confusión. Ellos nos han difamado públicamente con la nota de mulatos, y con cuantas calumnias puede inspirar una torpe venganza".<sup>4169</sup>

Mas no sólo los Funes eran sospechados de mulatos, sino también los Ascasubi, descendientes de la linajuda familia de las Casas; y los Tejeda, descendientes del Conquistador de Córdoba Tristán de Tejeda. En una carta que el Rector de la Universidad de Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan dirigiera el 16 de noviembre de 1800 a su amigo y ex-discípulo el Dr. Juan José Castelli,<sup>4170</sup> lo provee de información genealógica acerca del mestizaje sufrido por la familia de los Tejeda. Esta información la necesitaba Castelli para refutar la demanda que por incumplimiento de promesas de esponsales iniciara en 1798

María Victoria Pereyra y Mariño, hija del Administrador Principal de la Villa de Luján Antonio Pereyra y Mariño, y de la cordobesa Teresa Bruno y Tejeda, contra el Teniente Juan Ramón Balcarce.<sup>4171</sup>

Cuánto más pobre era la familia patricia en cuestión, más frecuente era la necesidad de implementar recursos judiciales, como el disenso matrimonial, para impedir el descenso social que una unión desigual del punto de vista étnico podía traer aparejado. Es en ese sentido que he hallado en la sociedad cordobesa dieciochesca una familia paradigmática, la De las Casas. Pueyrredón (1958) menciona los casos de Josefa de las Casas y Funes,<sup>4172</sup> que se opuso por motivos étnicos al casamiento de su hija Dolores con José Hermenegildo López,<sup>4173</sup> y al caso de Petrona de las Casas y Arrascaeta, sobrina de la anterior, y prima hermana de un sobrino de Dalmacio Vélez, que se opuso al casamiento del hijo de dicho sobrino, Patricio Álvarez y Zamudio, con Felipa Avendaño, por ser ésta, hija de madre india y padre plebeyo.<sup>4174</sup> En la defensa de su pretendida, Patricio exclamaba "...que aviéndome criado huérfano rodante y mendicante así entre la ciudad como fuera de ella, jamás me e reconocido por otra cosa [que plebeyo] en la estimación de las gentes".<sup>4175</sup> Y ahora, prosigue Patricio,

"...que llevado del agradecimiento que les debo a los padres de mi pretendida y el mucho afecto que a esta le profeso, tenía corrido una proclama para celebrar las bodas, sale suspendiendo estas una que dice ser mi tía por prima de mi finado padre".<sup>4176</sup>

#### **H-V Los prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.**

Asimismo, la vida de la Iglesia y la Milicia tampoco estuvo exenta de estos prejuicios. En Salta, en 1809, el Obispo Nicolás Videla del Pino, de origen cuyano, dirige un oficio al Virrey del Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros impugnando la autoridad del Deán y Canónigo Dr. José Miguel de Castro,<sup>4177</sup> para objetar su propio modo de actuar, por cuanto este último, era "...de una extracción oscurísima, siendo aquí público ser nieto de un mulato zapatero".<sup>4178</sup> En Córdoba, con motivo de proveerse el Curato de la Catedral con Fr. José Ignacio de Mendiola, y luego de haber enrostrado el Dr. José Ignacio Ascasubi al Dr. Bernabé Echenique el suicidio de su padre, este último llamó al Dr. Ascasubi descendiente de mulata por línea materna.<sup>4179</sup> Y reaccionando contra la falta de respeto de los oficiales milicianos criollos contra la autoridad del Cabildo de Salta, el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo,<sup>4180</sup> que era peninsular, denunció que el Regimiento Miliciano de Salta

"...es por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción, insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo desobedientes a prestar auxilio a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".<sup>4181</sup>

Si bien Acevedo (1965) minimiza la trascendencia de este hecho, nosotros creemos que, por el contrario, el mismo reflejaba un estado de ánimo colectivo en el seno del patriciado, por demás significativo.<sup>4182</sup> Profundamente indignados por las expresiones racistas del peninsular Archondo, los criollos Saravia y Texada contestaron afirmando que

"...es un efecto grosero de mala crianza el asentar que el Regimiento de nuestro mando se forma de blancos, indios y otras castas...¿Por ventura quiere [Archondo]

que los soldados sean todos blancos, rubios, y colorados? Pues báyase a las Regiones Septentrionales de la Europa, y allí los encontrará por millares".<sup>4183</sup>

Al soldado, argüían Saravia y Texada, no se le hace información de nobleza para alistarlo, "...ni nos devemos parar demasiado en lo trigueño del color".<sup>4184</sup> Si a Archondo lo fastidiaba la composición étnica del Regimiento de Milicianos, Saravia y Texada concluían que aquel debió "...haberse quedado, o buuelto a su País, pues que nadie lo llamó, ni lo detuvo".<sup>4185</sup>

De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la Revolución de Independencia.

## **Epílogo Sección II-C**

Del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo del siglo XVIII una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la Revolución de Independencia.

## **Sección II-D**

### **Fragmentación gremial del orden monopolista**

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal y estamental, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas de naturaleza gremial, que tratamos en dos sucesivos capítulos: movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil, y antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia

## **Capítulo II-D-10:**

### **Movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil.**

#### **Índice**

- I-I Tradición historiográfica en materia de comercio y movilidad social
- I-II Las distintas categorizaciones del comercio.
- I-III La mano de obra calificada que emigraba de España.
- I-IV El servicio personal registrado.
- I-V Los contratos de habilitación y riesgo compartido.
- I-VI El momento del inicio de la carrera mercantil.
- I-VII El rol del parentesco.
- I-VIII Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.
- I-IX El modelo de movilidad social.
- I-X. Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada.
- I-XI Los desempeños duales de oficios.
- I-XII Los juicios de disenso matrimonial.

#### **I-I Tradición historiográfica en materia de comercio y movilidad social**

Para el estudio de la estructura social colonial, el análisis de la movilidad social en el seno de la actividad mercantil misma mereció una atención principalísima. Diversos autores señalaron la importancia que tuvieron los conflictos de los mercaderes, con los encomenderos primero y con los terratenientes después, y las diversas resistencias generadas contra el movimiento ascensional de una pequeña burguesía mercantil.<sup>4186</sup> Garavaglia (1970) distinguió diferentes sectores de comerciantes según que comercializasen "efectos de Castilla", alternaran dichas operaciones con el tráfico de "productos de la tierra", exportaran "frutos del país", remesaran metálico al exterior, o impulsaran merced a la ligazón con la burocracia colonial "nuevas empresas comerciales tales como el comercio triangular". Borchart de Moreno (1984) y Booker (1993) también estudiaron los comerciantes del México dieciochesco, distinguiendo los almaceneros de los comerciantes, los cuales según ellos hasta cierto punto eran intercambiables. Socolow (1985), Heredia Herrera (1987) y García Vera (1989), distinguieron también entre comerciantes (mayoristas), mercaderes (minoristas), tratantes (proveedores) y mercachifles (ambulantes), así como diferenciaron entre los comerciantes españoles diversos sectores según su nacionalidad de origen (vascos, andaluces, gallegos, castellanos, catalanes, etc.).<sup>4187</sup> Al igual que Martínez Peláez (1971) para el caso de Guatemala, en el Río de la Plata deberíamos señalar como miembros de ese embrión pequeño burgués a los productores no artesanales, manufactureros, explotadores de mano de obra asalariada, como los propietarios de taonas, panaderías, hornos de ladrillo, fábricas de jabón, etc.

## **I-II Las distintas categorizaciones del comercio.**

Las distintas categorizaciones fueron fluctuando a lo largo del período colonial. En principio la legislación española afirmaba la superioridad del comercio al por mayor y la inferioridad del por menor.<sup>4188</sup> Si bien al comienzo los conceptos de comerciante y mercader fueron sinónimos, a fines del siglo XVIII habían pasado a significar, a juzgar por las referencias que brinda Molas (1985), "distintas actividades económicas y diferentes condiciones sociales". El comerciante pasó a representar a los mayoristas o mercaderes de lonja y el mercader a los minoristas o mercaderes de vara, en especial a los tenderos y mercaderes de tienda abierta. En la Nueva España, José de Gálvez había dividido a la comunidad mercantil en tres clases: los almaceneros, los tenderos y los distribuidores de telas.<sup>4189</sup> Si el comerciante se iniciaba como maestro o capitán de barco o como auxiliar de comercio (dependiente, mancebo, o mozo de tienda), o era habilitado en calidad de socio trabajador, podía al cabo de un tiempo en que acumulaba un capital propio o desposaba a la hija de su patrón o de su compañero, pasar a desempeñarse respectivamente como patrón de comercio, socio capitalista, compañero, mercader de tienda abierta o almacenero de caldos y frutos.

El pasaje de una categoría minorista o subordinada a otra mayorista o dominante, se sucedía así de una forma permanente. De acuerdo con Tutino (1976), los cajeros en México podían ascender a mercaderes, estos a comerciantes, y estos últimos a almaceneros. El comerciante podía iniciarse también como tratante, el cual llegó a contener una significación intermedia, inferior al gran comerciante monopolista y superior a la del simple tendero. Por cierto este no era el caso de los mercachifles o mozos de pulpería los cuales por ser analfabetos les estaba prácticamente vedado el ascenso a las categorías superiores. La categoría más baja era la de regentear baratillos, la que se destacaba por no pagar derechos de composición o alcabala alguna, siendo sus integrantes por lo general miembros de las castas. De aquí que la existencia de una sociedad de castas tampoco era ajena al proceso de estamentalización que se gestaba en la esfera de la circulación. No por iniciarse como mozos de tienda, los aspirantes ignoraban el arte del comercio. A todos los mozos de tienda asalariados se les entregaban los géneros con el compromiso de dar cuenta y razón de lo vendido para el cargo o descargo que les correspondiere.<sup>4190</sup> De aquí que todo mozo de tienda debía necesariamente saber leer y escribir al extremo de conocer el arte contable del debe y el haber.

## **I-III La mano de obra calificada que emigraba de España.**

La mano de obra calificada que emigraba de España hacia sus colonias en América tenía dos formas de lograr su objetivo. O bien firmaba un convenio de servidumbre en el punto de partida, lo cual le garantizaba pasaje y mantenimiento gratuito, o bien se endeudaba en el puerto de partida bajo la promesa de pagar su pasaje luego de arribar a destino.<sup>4191</sup> Esta última vía, la más común, ofrecía a los acreedores en España la dificultad de poder lograr el reembolso del monto acreditado --teniendo en cuenta las enormes distancias-- para lo cual debía librar los consiguientes poderes especiales a sus parientes o amigos más próximos en el puerto de destino. Por otro lado, esta vía le ofrecía a los mozos amanuenses la ventaja de poder elegir a su patrón. También le ofrecía la ventaja de poder dotarse de la información acerca del mercado de trabajo necesaria para negociar las condiciones de su eventual contrato de trabajo. La primer vía no le otorgaba a los mozos

amanuenses opción alguna respecto a la persona de su futuro patrón y a las condiciones de trabajo. Tampoco le ofrecía a ambas partes incentivos para renegociar los términos del contrato, dada su ignorancia de las condiciones vigentes en el mercado de trabajo del puerto de destino.

#### **I-IV El servicio personal registrado.**

El servicio personal registrado era un mecanismo crediticio donde el trabajo humano era alquilado. La demanda que los mercaderes tenían de mano de obra calificada para administrar sus tiendas estaba basada en el cálculo del valor descontado de sus ganancias netas futuras, luego de deducir los costos esperados que dichos mozos le devengarán. El valor actual de los mozos dependía entonces del valor esperado del servicio producido por el amanuense en cada año del contrato, el costo esperado de mantenimiento, supervisión y entrenamiento, y la tasa de descuento. Ambas vías de contratación le ofrecían a los comerciantes la ventaja de poder controlar el tiempo y el esfuerzo del trabajo de sus amanuenses con mayor rigor que si fueran hombres enteramente libres. El pasaje de una categoría de comisionistas o habilitados a otra de patrones o mercaderes por cuenta propia se sucedía de una forma ininterrumpida en el espacio colonial Rioplatense. Los futuros comerciantes, primero acumulaban habilidad comercial como mozos, mancebos o dependientes. Al cabo de uno a tres años si el mozo le inspiraba entera confianza, el patrón le armaba tienda como habilitado corriendo así los mozos más riesgos y necesitando menos consejos, para finalmente independizarse volviéndose dueños de tienda o almacén.

#### **I-V Los contratos de habilitación y riesgo compartido.**

Por estar extremadamente difundidos los contratos de renta proporcional y riesgo compartido (compañías de capital e industria o habilitaciones) la probabilidad o riesgo de pérdidas mercantiles fué en tiempos coloniales bastante baja. En efecto, en las escrituras de fiado, es decir contratos de renta fija y riesgo desigual, cargaban con la mayor parte o la totalidad del riesgo empresario quienes corrían con la responsabilidad de saldar la renta (deudores). Por el contrario, quienes debían cobrar solamente dicha renta (acreedores) cubrían su riesgo, por lo general, con la presencia de los correspondientes fiadores, o con la prenda o pignoración de la mercadería adelantada a crédito. En cambio, bajo contratos de renta proporcional, tal el caso de las compañías o sociedades de capital en negocios comerciales, el riesgo era compartido.

En una palabra, un dueño de tienda o almacén en lugar de empleados o mozos a sueldo preferiría consignatarios habilitados, por cuanto estos tienen un interés directo en escuchar, recordar y hacer caso a sus recomendaciones. De igual forma, cuanto menos conocedor del oficio sea el empleado (joven o recién llegado como inmigrante) aceptará en mayor grado ser habilitado que cobrar un sueldo, por cuanto el incentivo de la habilitación estimulará a que el dueño le ayude extendiéndole créditos más baratos con condiciones de pago menos onerosas. Pero no siempre la retribución de los consignatarios o habilitados era sólo a porcentaje. En numerosos casos el registrero se obligaba a otorgar además de un porcentaje, viáticos del orden del peso diario a cada habilitado que se internare con mercadería.

#### **I-VI El momento del inicio de la carrera mercantil.**

La suerte desigual corrida por los mozos de tienda varió según en qué momento histórico del comercio iniciaron su carrera mercantil. Una circunstancia era iniciarse antes de las Ordenanzas del Comercio Libre (1778), cuando aún estaba prohibido la extracción de metálico del Alto Perú vía Buenos Aires --salvo que mediaran licencias de internación-- otra circunstancia era iniciarse luego de instaurarse dichas Ordenanzas, cuando la prohibición de extraer metálico del Alto Perú se invirtió en perjuicio de Lima; y otra oportunidad muy distinta, era iniciarse cuando como consecuencia de las guerras Europeas (la Guerra de los Siete Años, la Guerra de la Independencia Americana, las Guerras de Coalición durante la Revolución Francesa) la introducción de mercaderías de Castilla desaparecía.

## **I-VII El rol del parentesco.**

La iniciación en la carrera mercantil tenía mucho que ver con el parentesco. Gerónimo Matorras se inició como mozo de tienda del que luego fué su suegro Antonio de Larrazábal, para luego ser a su vez maestro de una generación de prósperos comerciantes. Torivio Antonio de Viaña,<sup>4192</sup> y Joseph de San Pedro Lorente,<sup>4193</sup> comerciantes de intenso giro, entraron a la Casa de Matorras ganando ocho pesos al mes. El Procurador Francisco de Alva, a nombre de Miguel Fernández de Velazco, marido de Juana María Tadea Matorras, declara en 1788 que Matorras fué

"...un hombre de giro y de los más acaudalados del lugar; que habiendo resuelto pasar a España llevó consigo a Lorente en calidad de sirviente de donde regresó con él trayendo el gobierno del Tucumán y una negociación de más de 200.000 pesos".<sup>4194</sup>

No pudiendo manejar la negociación por sí mismo, Matorras la puso luego

"...a cargo de Lorente, como apoderado y Depositario de todo su caudal, y confianza,...habiéndosele posesionado más libremente de todo este manejo después de su fallecimiento por habersele nombrado de albacea".<sup>4195</sup>

El mismo Lorente reconoce que Matorras, después de iniciarse como comerciante en Buenos Aires, y de obtener en premio de sus notorios servicios, el Gobierno de la Provincia del Tucumán

"...pasó conmigo a España, donde con motivo de varias condiciones con que se le concedió el gobierno, y créditos que lograba, contrajo varias dependencias para su regreso a esta, también en mi compañía, como su dependiente: haziéndome aún después que se condujo a su Gobierno, su apoderado y depositario de sus confianzas en el manejo de sus asuntos".<sup>4196</sup>

Aparentemente embarcados en la tesis de la existencia de una fuerte movilidad social en el comercio colonial, Carretero (1970) y Sebreli (1985) insisten en subrayar el origen plebeyo de la burguesía terrateniente, ejemplificando el caso paradigmático de Juan Estéban Anchorena. La circunstancia de haber poseído Anchorena pulpería significaba por el contrario un cierto poder económico. La verdad del caso es que Anchorena se inició como mozo de tienda de la casa comercial de Domingo de Ibarra y no como mozo de pulpería, para lo cual se requería de un elemento extremadamente escaso en aquellos tiempos, cual era la capacidad de llevar libros contables, lo que a su vez requería ser alfabeto y estar dotado de cierta educación, por elemental que ella fuere.<sup>4197</sup> Sólo los

mercaderes o comerciantes se hallaban obligados a llevar libros por tener que manifestar periódicamente al Receptor de Alcabalas los negocios que hacían. Los boticarios, carniceros, panaderos, maestros artesanos y demás oficios minoristas no estaban obligados a llevar libros y por ello en su gran mayoría eran analfabetos. Por otro lado, en la mayoría de dichos casos su giro comercial era tan pequeño que no les daba para emplear un mozo que les llevara eventuales libros contables.<sup>4198</sup>

Siguiendo a Lipset (1951), tal vez sea infundado el deducir los antecedentes familiares de un individuo del hecho de que su primer empleo en el comercio haya sido muy bajo o de que haya recibido escasa educación. De todas maneras, era más probable que las personas cuyos padres estaban en buena posición recibieran más educación y hubieren comenzado su carrera en una ocupación "superior" que aquél cuyos padres eran pobres.<sup>4199</sup> Puesto que un alto nivel educativo estaba estrechamente vinculado a un estamento elevado, todo exámen de las influencias familiares sobre la elección ocupacional debía tomar en cuenta la forma desigual en que se distribuían las oportunidades para la educación entre los hombres provenientes de diferentes estratos sociales.<sup>4200</sup> La capacidad de leer y escribir valorizaba a los candidatos a mozos de tienda a los ojos de sus eventuales patronos. De ahí que la educación en tiempos coloniales, antes que una forma de consumo, fué un ingrediente activo para la producción de servicios administrativos públicos o privados.

## **I-VIII Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.**

Pero lo definitivo para la asignación estamental de los mercaderes-burócratas no fué la legitimidad del origen ni la cantidad de sus ingresos sino la naturaleza del consumo y de las pautas morales que practicaban. La necesidad que padecían los comerciantes-burócratas de reforzar el prestigio que se derivaba de su ocupación y riqueza los inducía a incurrir en altas pautas de consumo, que incluían afiliaciones a ordenes militares y religiosas, fundaciones de capellanías y patrimonios y adquisiciones de limpieza de sangre. Un sólo caso se registró en que como consecuencia de las actividades mercantiles desempeñadas en el Río de la Plata una familia navarra había alcanzado el Marquesado. Caro Baroja (1985) relata como Juan Bautista de Iturralde, amigo de Juan de Goyeneche y tío de Pedro de Astrearena, había alcanzado en Madrid el Marquesado de Murillo.<sup>4201</sup> Pero lo que Caro Baroja ignora en su estudio es que un pariente de Iturralde, José Norberto Iturralde, vecino de Madrid, había concertado en Buenos Aires, entre 1736 y 1745, media docena de operaciones de fiado por valor de diez mil pesos plata.<sup>4202</sup>

De acuerdo con la información brindada por Lohmann Villena (1947), en el distrito de la Real Audiencia de Buenos Aires se asignaron nueve afiliaciones en la Orden de Santiago, nueve en la de Carlos III, una afiliación en la Orden de Santiago, y otra en la de Calatrava. Sin embargo, la frecuencia de afiliaciones caballerescas en el Buenos Aires virreinal distaba de aproximarse a la frecuencia vigente en Charcas o Chile y menos aún a la vigente en Lima. Para el caso de la Orden de Santiago, cuando Buenos Aires contaba con nueve caballeros, Charcas y Chile contaban con 21 y Lima con 230. En el caso de la Orden de Carlos III, mientras Buenos Aires contaba con nueve caballeros, Charcas contaba con once, Chile con quince, y Lima con 42. La desproporción era más acentuada aún en los casos de las ordenes de Alcántara y Calatrava. Mientras Buenos Aires contó con un sólo caballero de la Orden de Calatrava, Lima contaba con 96. En forma similar, mientras

Buenos Aires contó con un sólo caballero de la Orden de Alcántara, Chile contaba con 6 y Lima con 33. El ingreso de cada nuevo afiliado a una orden militar era un evento de gran trascendencia social y cultural, pues era la excusa para organizar banquetes, bailes y funciones de teatro, y los lugares obligados donde evaluar el prestigio social de cada vecino. Cuando el Contador de las Cajas Reales Francisco Cabrera ingresó a la Orden de Carlos III, Luis Sabatini informaba a Miguel Ryan el 29 de diciembre de 1785 que el 6 de enero del nuevo año de 1786

"...el Caballero Contador Cabrera se cruzará de la Real Orden de Carlos tercero, el Sr. Intendente debe ser su padrino el qual esta preparando una gran funzi3n para el medio día y en la misma noche habrá un gran baile en casa del crucificado, estas son las [noticias] importantes de este pueblo [Buenos Aires], como la de que la misma noche del 6 se vuelve abrir este famoso teatro cuio nuevo empresario es el insigne Don Alonso Vélez".<sup>4203</sup>

Amén del ingreso a órdenes militares y religiosas y de la fundación de capellanías, los grandes comerciantes y altos funcionarios consumían sus ingresos en "lujosos vestidos, coches, calesas, quintas, solares, y caballos de regalo", así como incurrían en la reacción arqueológica de requerir informes genealógicos con los cuales legitimar su rauda acumulación. Si bien el recurrir a los Informes de Limpieza de Sangre ocurrieron antes de las Reformas Borbónicas, a partir de su implementación estos Informes se multiplicaron. Ya en 1759 Asencio de la Torre,<sup>4204</sup> otorgaba un poder a Pedro Iribarren para que verificara el linaje de sus abolengos.<sup>4205</sup> La preocupación por la legitimidad de la filiación también generaba toda suerte de poderes especiales. En 1764, Phelipe Santiago del Pozo,<sup>4206</sup> libraba un poder a un vecino de Santa Fé, Joaquín Maciel, para que "...haga información plena de mi nacimiento y de si soy hijo de Bernardino del Pozo y Teresa Ximenez Naharro".<sup>4207</sup> La petición para que se les reciba información de testigos con que probar limpieza de sangre fué solicitada por Joaquín Marín,<sup>4208</sup> natural de Montevideo, en 1772,<sup>4209</sup> Domingo Antonio de Jesús en 1789,<sup>4210</sup> Manuel Perdriel en 1791,<sup>4211</sup> Joseph de Echevarría por su suegro Francisco Ramos y Pérez en 1792,<sup>4212</sup> Antonio de Dorna y Azevedo en 1793,<sup>4213</sup> y Juan José Rocha en 1797.<sup>4214</sup>

Aquellos comerciantes porteños que no se trasladaban hasta las provincias interiores para realizar las mercancías que importaban de España preferían enviar a sus hijos, sobrinos o primos, para que operando como dependientes abrieran tiendas transitorias hasta liquidar las remesas de mercancías que les confiaban. Mas el exclusivo parentesco, no era garantía de cumplimiento y lealtad en las operaciones mercantiles, cuando la distancia no permitía ejercer un control periódico y directo, y las tentaciones de Potosí para malgastar los dineros, eran muchas. En el caso de Don Juan de Osamiz y Urtubey, le fué adelantado por su primo hermano Juan Antonio de Lezica y Osamiz seis remesas por valor de \$98.820 entre 1776 y 1783. Pero dicho Osamiz

"...ingrato y desconocido lexis de corresponder a tantas finezas, y de dar cumplimiento a sus obligaciones, no sólo no ha procurado remitir los caudales correspondientes para pagar a su benefactor, pero lexis de ello tengo [Lezica]) puntuales y expresas noticias de que su conducta es despreciable, y que en lugar de aplicarse a su snegocios dedica el tiempo a sus devaneos, y disipa los bienes de modo que causa escándalo y a mi me produce un perjuicio inmenso".<sup>4215</sup>

## **I-IX El modelo de movilidad social.**

Tampoco toda movilidad social fue sólo ascendente, pues dábanse casos en que la movilidad zigzagueaba de acuerdo con la buena o mala racha experimentada en el comercio. Cuanto más bajo se hallaba un comerciante en la jerarquía mercantil más inestable era la posición detentada. Por otro lado, el descenso social provocado por el derrumbe comercial llevaba a toda suerte de desintegración y desmoralización, desde el divorcio hasta el suicidio, pasando por la liquidación de los bienes muebles (mano de obra esclava) e inmuebles, urbanos y rurales.

El modelo de movilidad social descendente ilustrado por la figura retórica "padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero" fue sugerido por Mörner (1983) como hipótesis a verificar. Para evitar dicha decadencia los comerciantes españoles trataban por todos los medios de asimilar exclusivamente a sus propios compatriotas, trayéndolos de España, para así luego habilitarlos y casarlos con sus hijas y/o sobrinas. De la muestra de 124 mozos o dependientes de comerciantes citados en la Tabla B-I, que operaron en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII, comprobamos que 17 dependientes, es decir el 13%, fueron hijos de los mismos mercaderes listados, y un número no determinado aún, fueron parientes.<sup>4216</sup> De aquí que el proceso de diferenciación socio-económico se habría hallado en este caso parcialmente restringido por el rol inmovilizador que cumplía el parentesco en la movilidad social de la población mercantil.

En un gran número de casos, los dependientes o mozos se trasladaban al interior del Virreinato, para cumplir con las tareas encomendadas por sus patrones. El caso de Rafael de los Reyes y Serrano,<sup>4217</sup> es el de un mozo de tienda de un gran comerciante, como Francisco Álvarez Campana, que de mozo en Buenos Aires pasó luego a ser su apoderado en Potosí.<sup>4218</sup> El caso de Antonio Benito Fragueyro,<sup>4219</sup> es el de un joven gallego, mozo del comerciante José Gómez Psychoto,<sup>4220</sup> que migra a Córdoba, donde contrae matrimonio con la hermana o sobrina de su patrón, Agustina del Corro.<sup>4221</sup> El caso de Julián Gálvez es el de un joven nacido en Murcia, mozo del comerciante Cristóbal de Aguirre --veinte años mayor que Gálvez, especializado en el tráfico con Paraguay-- que migra a Santa Fé, donde casa en 1784 con María Gregoria Troncoso y Mendieta.<sup>4222</sup> El caso de Manuel de Tezanos, mozo de Joaquín Pintos, es el de un Santanderino, nacido en Caguéniga, 26 años menor que Pintos, que se casa con una hija o sobrina de su patrón, Juana Pintos.<sup>4223</sup> Los casos de Salvador Alberdi, mozo de Antonio López García; Pedro Antonio de Zavalía,<sup>4224</sup> mozo de Domingo Belgrano Pérez; José de las Muñecas, mozo de Juan Bautista Azcuénaga; y Jose Elías Velarde, mozo de Cecilio Sánchez de Velasco; es el de mozos que migran al Tucumán, donde contraen matrimonio con hijas de la élite local. En el caso de Alberdi con Josefa Rosa Aráoz, hija del Capitán Javier Aráoz y Paz de Figueroa, que fuera Alcalde de Hermandad en 1775, y de Petrona Valderrama; en el de Zavalía con Gertrudes Laguna, hija de Miguel Laguna y de Francisca Bazán, y en segundas nupcias con María Josefa de Lami y López de Velasco, hija de Pedro Lami y de María Petrona Lami y López de Velasco,<sup>4225</sup> en el de Muñecas con Elena Alurralde, hija de Miguel Alurralde y de Josefa de Villagra López,<sup>4226</sup> y en el de Velarde con María Teresa Villafañe.<sup>4227</sup> Algunos comerciantes llegaron a emplear en forma sucesiva a diversos mozos de tienda. Joaquín Pintos llegó a emplear hasta cuatro mozos, incluido su hijo Miguel. Antonio de las Cagigas, Casimiro Francisco de Necochea, Juan de Osorio, Tomás Antonio Romero, Gaspar de Santa Coloma y José Francisco Vidal llegaron a emplear simultáneamente, a tres mozos. La Tabla B-I nos ilustra de la gran proporción de comerciantes que llegaron a emplear hasta dos mozos.<sup>4228</sup> Y la Tabla B-II nos ilustra de la gran proporción de mozos de tienda que llegaron a trabajar hasta con dos comerciantes. Bentura Cobiaga sirvió de mozo de tienda a José Pastor Lezica y a Francisco Javier de

Riglos. Vicente Gainza sirvió a José Blas de Gainza y a Lucas José de Islas. Quirce Giner a Miguel Sáenz de Baños y a Manuel del Cerro Rubio. Tomás Méndez a Bentura Miguel Marcó del Pont y a su cuñado Julián Díaz de Vivar.

#### **I-X. Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada.**

A los efectos de identificar mejor el estamento o categoría de un mercader era preciso en algunos casos determinar la naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada, en el sentido de administración, habilitación o compañía. Las partes envueltas en los litigios tenían en cuenta la condición de patrón o compañero con que se carteaban entre sí así como la forma en que se rendían cuentas mutuamente. En los autos entre Manuel Duarte,<sup>4229</sup> y Gregorio López de Vigo,<sup>4230</sup> ventilado en 1775, el primero alegaba que a vista de lo que Vigo dice "...no se puede dudar de que el negocio no fue de compañía, pues [Vigo] no llama a mi parte [Duarte] por su compañero, sino por su Patrón".<sup>4231</sup> La forma con que se rendían cuentas mutuamente también traslucía la naturaleza jurídica concertada. En los autos citados, Duarte manifestaba que "...cuando los negocios son de compañía al fenecerse ésta, se saca primero el principal de todos los efectos que hay en ser".<sup>4232</sup> De haber sido el negocio que Vigo administraba de compañía "...deberían estos efectos entrar con aquellos a subsanar el principal para que así quedare cubierto".<sup>4233</sup>

El coincidir la calidad de patrón de una empresa comercial con la de compañero de una sociedad comercial amortiguaba la diferenciación económica entre capitalistas y empresarios. Cuando dicha dualidad no podía amortiguarse se sucedían conflictos de toda índole que llegaban en algunos casos a los estrados judiciales. En el caso de la compañía, el riesgo era compartido por igual en la medida que los socios resultaban en situación de igualdad. Pero cuando la compañía era una sociedad de capital e industria, donde un socio ponía el capital en mercancía y el otro su propio trabajo sin mediar la garantía de un fiador, es indudable que el socio capitalista corría un riesgo mayor que el socio trabajador. En ese sentido, la encomienda o factoraje se asimilaría según Martínez Gijón (1970) a una suerte de compañía de capital e industria o habilitación, donde el compañero que no aporta con dinero a la formación del capital social sería un compañero que aporta sólo su trabajo o industria. Al parecer la única diferencia con la compañía radicaría en la mayor gravedad de las penas que podrían ser impuestas a los factores o encomenderos en caso de incumplimiento de la obligación. Sin embargo, esta asimilación era resistida por quienes aportaban el capital.<sup>4234</sup>

En los puertos de entrada, a diferencia de las provincias interiores, la comercialización de los productos importados, denominados efectos de Castilla, merecía toda suerte de maquinaciones con tal de eludir los gravámenes fiscales, establecidos con el fin de controlar el contrabando. Por ejemplo, en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII, Francisco Ximénez de Mesa, el Administrador de la Aduana porteña, ampliamente conocido por fraudulento, nos manifiesta la existencia de almaceneros tenderos que vendiendo al por menor lo que han traído por su cuenta de España, quieren les valga la calidad de almaceneros y no la de tenderos.<sup>4235</sup> Esta confusión de funciones derivó en una "...controversia de opuestos intereses, que trae perturbación, e irá en mayor incremento si la autoridad no lo fija", pues los almaceneros que vendían al por menor no pagaban la alcabala debida, mientras que los tenderos cargaban con el peso del gravamen.<sup>4236</sup> Para dificultar el contrabando, la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre

tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos. Los propios agentes mayoristas del monopolio gaditano en Buenos Aires se esforzaban para que sus habilitados en el comercio minorista no se mezclaran en tratos ilícitos.<sup>4237</sup>

La movilidad ascendente de ciertas fracciones mercantiles quedó ilustrada en la legislación y la moral de la época y en la resistencia que dicha movilidad generó, ejemplificada en los numerosos juicios de disenso matrimonial que entonces se dirimieron en los estrados judiciales. Esta resistencia, como es obvio, obstaculizaba de diversas formas el funcionamiento normal del mercado crediticio. Una de las categorías más bajas en la pirámide mercantil estaba dada por los que regenteaban pulperías,<sup>4238</sup> los cuales se caracterizaban por ser criollos y por menudear exclusivamente víveres y provisiones del país, a diferencia de los tenderos que eran por lo general peninsulares y menudeaban exclusivamente mercadería importada. Pese a su escasa relevancia estamental, para ser pulpero se exigían determinadas condiciones étnicas y sociales, que restringían la movilidad social ascendente. Los miembros de las castas, responsables del despacho de pulperías, por ejemplo, no podían ser artesanos ni ejercer oficios artesanales.<sup>4239</sup> Los mercaderes y tenderos trataban a su vez de evitar la competencia y el ascenso estamental de los pulperos. La primera vez que los mercaderes nombraron a los comerciantes de bandola o trajín, también llamados pulperos volantes, fue en oportunidad de un litigio donde en el afán de rebajarlos a un estamento inferior al de los tenderos los llamaron buhoneros, revendedores, o mercachifles. En su réplica, los llamados buhoneros recuerdan que entre los mercaderes "...apenas se contarán cuatro o cinco cuyos padres no se hubieren iniciado como mercachifles y pulperos, y en cortísimo número los que por sí mismos no se hubieren iniciado como tales".<sup>4240</sup>

Entre las motivaciones sociales por las cuales se tenía a los pulperos en menos, el bando del 13 de febrero de 1788 nos revela que "...las pulperías son causa de que los que están juntos bebiendo les conviden, les provoquen a gastar, y con este motivo ni los créditos de sus amos estén seguros, ni el servicio de sus casas esté cumplido, viviendo incomodados".<sup>4241</sup> La inseguridad que los pulperos difundían la expresa con elocuencia dicho bando cuando revela que en los Archivos se hallarán procesos obrados contra pulperos ocultadores de robos y cooperadores al fraude de esclavos, "...se encontrará también esclavos indiciados en robos, que han hecho a pulperos, por haberles dado acogida con sus pulperías".<sup>4242</sup> Finalmente, el mismo bando se preguntaba "...¿cuántos pulperos han sido depositarios del dinero que los esclavos defraudaban a sus amos para tener con que libertarse?".<sup>4243</sup>

Entre las razones que diferenciaban a las tiendas de las pulperías, este último expediente nos refiere también que en las tiendas

"...no hay [las mismas] concurrencias que en las pulperías, no ai las guitarras, no ai las bebidas, no ai juegos. En las pulperías si [las hay], luego estas se deben celar como ocasionadoras de las desgracias y ruinas del vecindario".<sup>4244</sup>

De ahí que, esta realidad aconsejaba que en los casos en que las pulperías obraban también como tiendas

"...coloquen o más arriba o más abajo su tienda para que las mercancías no se mezclen con el despacho de abastos [pulperías], por que éstos deben tener

precisamente el mostrador a la puerta, como oficinas donde se temen las desgracias".<sup>4245</sup>

De nada podía servir para remedio de desgracias, a juicio del Intendente de Policía, el que se ampare con licencia en el ejercicio de pulperos sólo a los que tuvieron un principal (capital) de \$500, pues los excesos en el año 1800

"...se cometen indistintamente en las pulperías de grueso y corto principal, y el estar más o menos abastecidas no aumenta ni disminuye el desorden, sino que en todas se nota la concurrencia de gente ociosa y mal entretenida, a que son consiguientes las más tristes y sensibles desgracias".<sup>4246</sup>

La movilidad económica y social ascendente era vista con sospecha por aquellos comerciantes que empleaban a mozos asalariados en sus tiendas y pulperías. En un temprano caso que llegara a los estrados judiciales Juan de Mosquera,<sup>4247</sup> un testigo en una causa ejecutiva iniciada en 1732 por Nicolás de la Quintana, dice del demandado Juan Antonio Aldao que pasó:

"...de la esfera baja de oficial de carpintero que es su ejercicio a otra más alta que no a podido lograr [aún], asta el manejo de mis bienes el que logró con precaución de ser mozo soltero".<sup>4248</sup>

Otro testigo afirma haber oído decir y ser público y notorio en Buenos Aires, que Aldao

"...cuando se puso en la administración de la referida tienda tenía porción de herramientas de carpintería y torno a la inglesa que según oyó decir valdría hasta \$800 a mil pesos".<sup>4249</sup>

Frente a estos pretendidos estigmas, Aldao intenta minimizar la acusación y sin abdicar de su pasado afirma que

"...el tiempo que yo estuve trabajando en dicha tienda fueron dos días ocupándome sólo en hacer una mesa de campaña para el dicho Gobernador Don Juan de Armaza con quien había yo de hacer viaje a la Provincia del Tucumán, y en casa de dicho Gobernador le estuve también componiendo dos cajas, y cuatro taburetes de campaña".<sup>4250</sup>

Mas adelante, también reconoce Aldao que hizo en su oficio artesanal, que distaba el de ser el de un vulgar carpintero, "...una cuna curiosa en forma de coche moda a la inglesa".<sup>4251</sup>

## **I-XI Los desempeños duales de oficios.**

La simultaneidad en el desempeño dual de los oficios de artesano y pulpero también era vista con sospecha. En un caso acontecido entre 1768 y 1776, Antonio Troyano,<sup>4252</sup> dueño de una pulpería, en los autos con su paisano Alonso Reina,<sup>4253</sup> dice que "...el manejo de una pulpería, ya en vender, y ya en salir a comprar, y cobrar lo que se fía, no puede dar lugar a usar de otro ministerio [como la sastrería]".<sup>4254</sup> Esta oposición a desempeñar otro oficio obedecía fundamentalmente al temor que Troyano tenía de que el dinero con el que Reina compró un negro esclavo proviniera de los ingresos de su pulpería. Este temor era reforzado por el hecho de que si fuera cierto que los ingresos con los que Reina compró el negro provenían de su oficio de sastre "...no era regular se hubiese

sugetado a la penosa tarea de pulpero y sirviente de otro", por lo visto un oficio subalterno. Es obvio entonces, para la mentalidad de Troyano, que el desempeño simultáneo de los oficios de sastre y pulpero, amén del perjuicio material que le podía causar, ofendía la necesaria igualdad social de los oficios que un solo vecino podía desplegar, amenazando así la estabilidad social del Buenos Aires colonial.

## **I-XII Los juicios de disenso matrimonial.**

Los numerosos juicios de disenso fundados en la Real Pragmática de Carlos III reflejan la honda preocupación de estos mercaderes por el status y el prestigio social de sus futuras nueras. Aprovechando la circunstancia de que dicha Pragmática prescribía diligencias previas que debían anteponerse a los esponsales Marcos José de Riglos libró un poder en 1789 a su hijo Francisco Javier de Riglos,<sup>4255</sup> residente en Potosí, para que se opongá formalmente en la Curia Eclesiástica de Arequipa "...a el subrepticio matrimonio que a contraído mi hijo Rafael José de Riglos con Bernardina Cáseres".<sup>4256</sup> De igual forma, Miguel Fernández de Azebedo,<sup>4257</sup> otorgó un poder en 1787 a Bernardino López, vecino de Santiago de Chile, "...para que pueda presentarse ante cualquier Juez a efecto de que se le impida el casamiento que allí pretende mi hijo Joaquín Fernández".<sup>4258</sup>

Los juicios de disenso matrimonial revelan también la resistencia de los integrantes de ciertos estamentos mercantiles a admitir a miembros de otros estamentos o jerarquías tenidos en menor categoría. Cuando Germán Albitro objetó en 1785 a Carlos Fornier como pretendiente de su hija Felicianá, Fornier alegó en su descargo que

"...no hay desigualdad en la sangre ni en el ejercicio, pues yo soy un hombre blanco y bien nacido, y si tengo casa de Fonda, esto no me impide, cuando el padre de la referida tiene en esta Ciudad tienda pulpería pública en la calle del Cabildo, con que sacamos que el susodicho no se halla dotado de causa racional y justa para negar su consentimiento al matrimonio, por que con él ni se ofende gravemente al honor de la familia, ni menos se perjudica a el estado".<sup>4259</sup>

Como el propio texto lo ilustra sobradamente lo que en aquella sociedad ofendía el honor de una familia y perjudicaba la estabilidad del estado era la desigualdad étnica, estamental y profesional entre los contrayentes de un matrimonio. Si bien la desigualdad sanguínea era la más obvia, la desigualdad estamental y las diferencias en el ejercicio profesional eran las que más dificultades ofrecían. En efecto, Fornier planteaba en su caso que una casa de fonda no tenía porqué ser tenida en menos que una pulpería. La igualdad estamental y profesional entre las partes era un requisito sine qua non que difícilmente se cumplía en una sociedad profundamente alterada por una legislación comercial que ofrecía numerosas oportunidades económicas a nuevos aspirantes a ascender socialmente.

Mas no siempre la mudanza de artesano a tendero garantizaba prosperidad económica y ascenso social. Cuando en 1790 Juan Rodríguez por "darle gusto" a las aspiraciones de ascenso social de su mujer Sebastiana Calbo, muda de profesión convirtiendo su taller en tienda de mercaderías, su falta de experiencia en el oficio de tendero acabó "...con los pocos fondos que me había proporcionado mi primer ejercicio".<sup>4260</sup> Tal fué su descalabro financiero que en 1799 --al fracasar en sus ambiciones de ascenso-- su mujer "...me tomó cruel ojeriza" y con "...escándalo me profesa antipatía", habiendo terminado por iniciarle un juicio de divorcio.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos suscitados en el comercio de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la fragmentación social subsistente entre los mercaderes asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población mercantil activa estaba discriminada de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado y en cada uno de los Cabildos contribuyó a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

## **Capítulo II-D-11      Antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia.**

### **Índice**

- J-I      Tradición historiográfica en materia de crisis sociales
- J-II     Tradición historiográfica en materia de balcanización continental

### **J-I      Tradición historiográfica en materia de crisis sociales**

Entre las crisis que enseñorearon la dominación absolutista, las que habrían tenido una repercusión especial en la puesta en cuestión de la dominación colonial habrían sido las crisis sociales, ejemplificadas en el colapso de los órdenes mercantil, señorial y esclavista. Con referencia al orden mercantil colonial, debemos recordar que la plutocracia (los comerciantes) de la época colonial, no constituía una burguesía, pues estaba apasionadamente interesada en asimilarse a la nobleza, adquiriendo a cualquier precio títulos de nobleza o afiliación a órdenes militares, así como estaba fuertemente entusiasmada por la práctica burocrático-medieval de la limpieza de sangre.<sup>4261</sup> El estilo de vida auténticamente "burgués", acuñado por Weber y Sombart, era según Góngora (1975) y Flores Galindo (1984), ajeno a la conciencia colectiva de la clase mercantil colonial. Pero para entender a su vez este senil "estilo de vida" habría que tener en cuenta que el proceso regresivo sufrido por la burguesía comercial europea desde su apogeo cuando el descubrimiento de América comenzó a manifestarse durante el Renacimiento, en la misma Florencia de los Médici, donde a juicio de Kofler (1974) operaba un mecanismo cíclico de regresión o de desarrollo "...hacia la feudalización de la vida, o hacia su hispanización, cuyos elementos son el desprecio por el trabajo y la manía por la limpieza de sangre".<sup>4262</sup> Ni Inglaterra ni Francia estaban entonces inmunes al contagio de este fenómeno.<sup>4263</sup>

Pero esta "reacción aristocrática" o exasperación del esnobismo nobiliario experimentado en Francia durante los siglos XVIII y XIX, era a juicio de Tudesq (1978) y Furet (1980), más una supervivencia o reminiscencia de la mentalidad de la modernidad absolutista, que un dato de la vida económica.<sup>4264</sup> No así en Alemania donde, según Rosenberg (1958), este clima perduró hasta la llegada de Bismark. Y menos aún estaban inmunes a este proceso las colonias sureñas de los Estados Unidos. Labaree (1948), Sydnor (1952,1965) y Baltzell (1958,1964) comprobaron que con excepción de Nueva York y Massachussetts, todas las demás colonias se encontraban bajo la dominación

política y económica de familias aristocráticas. Sin embargo, ya Becker (1909) había puesto en tela de juicio la exclusión de Nueva York de dicha realidad, pues descubrió que sus luchas políticas estaban basadas únicamente en enemistades familiares.<sup>4265</sup>

Con respecto a la crisis de la hegemonía mercantil en el Río de la Plata, diversos autores (Magariños Cervantes, Estrada, López y Quesada) señalaron como contradicción fundamental que dio lugar a la crisis del modelo colonial-absolutista no la contradicción entre señores feudales y siervos sino el antagonismo entre los partidarios del comercio monopolista y los seguidores del “comercio libre”. Pero así como fueron los primeros en vislumbrar una clave del antagonismo, fueron también los primeros en encubrir la u ocultarla tras las consignas ideológicas del librecambio. Ninguno quiso ni supo describir las connotaciones sociales y económicas del grupo mercantil auténticamente progresista. No podía ser de otra manera si lo que se buscaba era legitimar la subordinación a las casas monopolistas de Cádiz.

Respecto a la resistencia indígena contra las exacciones coercitivas de la colonización borbónica española, Joaquín V. González (1888) sostuvo precozmente que el hecho revolucionario surgió de la propia raza vencida (indígena). En ese sentido, medio siglo más tarde Lewin (1943) insistió en el inextricable vínculo entre la rebelión de Tupac Amaru y el origen de la revolución de independencia, y treinta años después, Cornblit (1972) probó, con relación a la insurrección de originarios acontecida en el Alto Perú a fines del siglo XVIII, que la masa de indios forasteros resultó mucho más movilizable que la de los indios originarios, y que la primitiva coalición entre indígenas y criollos celebrada en Oruro se vio frustrada por “...la rapidez y violencia con que los estratos más bajos de la sociedad se movilizaron en el levantamiento”.<sup>4266</sup> En cambio, Vilar (1981), Domínguez (1985), O’Phelan Godoy (1985) y Cajías de la Vega (1987) aluden a un “desdoblamiento”, producido luego de iniciada la lucha.”...resultado de la violenta e impredecible irrupción de las masas indígenas” que, al escaparse del control de la dirigencia, provocaron en los criollos el “miedo a las masas” o su retraimiento.<sup>4267</sup> Este “miedo” indujo a los criollos a encabezar el peso de la represión.<sup>4268</sup> Y más recientemente, Serulnikov (2004) ha postulado que la sublevación de 1780 se habría alimentado también de la crisis en la propia autoridad cacical, cuya legitimidad había dejado de estar sometida a rígidos principios nobiliarios.

Y respecto a la crisis del orden esclavista, la resistencia esclava fue ocultada en muchos lugares (tal el caso del Río de la Plata) con los mitos de la docilidad de los esclavos y la benignidad de la compulsión existente. Azara (1809,1943) fue el primero, seguido por Vidal (1820), Parish (1839), Gálvez o Quesada (1883), e Ingenieros (1937), en fundar dichos mitos.<sup>4269</sup> Sin embargo, la creciente relevancia que fue adquiriendo la población de color libre, y con ella el mayor número de fugas, cimarronaje y bandolerismo, fue exigiendo otras respuestas a la vigencia de dichos mitos.

## **J-II Tradición historiográfica en materia de balcanización continental**

Algunos modelos historiográficos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos sobre la base de la transición del orden imperial-absolutista al orden nacional-republicano. Para Juan Agustín García (1900), el más relevante historiador positivista argentino y, paradójicamente, el más audaz revisionista, seguidor del conservador sociólogo francés Federico Le Play, la lucha de clases en la periferia de los centros metropolitanos tomaba lugar entre una burguesía portuaria y un proletariado interior o

provincial. Al identificar a la burguesía con la facción unitaria y al proletariado interior con la facción federal, García no haría otra cosa que caer en un reduccionismo de clase ajeno a la realidad histórica. Más aún, al reducir el antagonismo a esos términos, García se constituyó inmediatamente en la fuente más autorizada del revisionismo anti-liberal. En su lugar, Ingenieros (1900) sugirió que los conflictos que dieron lugar al proceso de autodeterminación nacional ocurrieron principalmente dentro del bloque en el poder, entre diferentes corporaciones y estamentos. Más aún, Ingenieros insinuó, sin alcanzar a probar su hipótesis, que la idea de auto-gobierno y auto-determinación tomó lugar debido a un proceso conflictivo causado por la penetración del capital comercial.<sup>4270</sup>

No obstante estas contribuciones, los intelectuales de la última tradición positivista fueron incapaces de proveer aceptables antecedentes históricos para la súbita ruptura de las comunicaciones entre los pueblos de España y América Latina, entre Buenos Aires y las provincias interiores, y entre la ciudad y el campo. Algunos miembros de la Nueva Escuela Histórica (una tendencia neo-positivista), tales como Levene (1911), Juan Álvarez (1914), Molinari (1914) y Ravignani (1927), adoptaron una perspectiva materialista para interpretar la historia argentina. Levene (1911) y Ravignani (1927-30) reconocieron la existencia de clases sociales (disimuladas como corporaciones, castas y estamentos) en el Buenos Aires del siglo XVIII, y si bien asignan el origen de la Revolución a causas internas, al negar la precedencia de las luchas como el principal instrumento mediante el cual las clases se constituyen como tales, sus teorías revelaron la ausencia de un marco teórico consecuente. Son Molinari (1914) y Álvarez (1914) quienes primero insisten maniqueamente en la virtud primordial de las causas externas. Para Molinari (1914), las causas internas (la Representación de los Hacendados de Moreno) tuvieron una escasa relevancia para decidir el Decreto de Libre Comercio, el cual se originaba prácticamente en causas externas (presión británica). En otras palabras, la apertura de los puertos no habría sido decretada respondiendo a las demandas de una burguesía activa y consciente de sí misma sino sólo a la presión externa. También para Álvarez (1914), las causas internas eran algo irrelevantes al negarle a Buenos Aires la posibilidad de engendrar una burguesía importadora. Según Álvarez, era "...imposible que una ciudad donde no existen capitales de comercio, pueda importar directamente del exterior lo que necesite la región que en ella desemboca".<sup>4271</sup>

Más luego, la escuela de pensamiento marxista (Puiggrós, 1940; Astesano, 1941) es la que otorga a las causas internas y a los criterios explicativos modo-productionistas un rol crucial en la interpretación del proceso de desmembramiento de América Latina. Para Puiggrós (1940), la ruptura de la unidad virreinal que arrojó a unas regiones contra otras (Montevideo versus Buenos Aires) debe atribuirse al boom comercial y productivo engendrado en el contexto de un orden colonial feudal, a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, donde al prevalecer un orden capitalista ascendente, las diferentes regiones lograron afianzar sus vínculos dando lugar al nacimiento de una sola nación.<sup>4272</sup> La tesis de que la estructura imperial española se pudo romper desde adentro a través de una suerte de lucha de clases o guerra de liberación nacional, alimentada por la ideología iluminista europea, nutrió la hipótesis de que la causa de la independencia fue principalmente el descontento económico de una "embrionaria burguesía" suficientemente próspera como para desafiar a la metrópoli.<sup>4273</sup>

En la última posguerra, con Céspedes del Castillo (1946), Arcila Farías (1946), Haring (1947), García (1948), Bagú (1949) y Gil Munilla (1950), la ruptura de comunicaciones entre España y América Latina adquiere nuevamente una explicación más

cercana a las interpretaciones circulacionistas, al hacerse hincapié en las rivalidades comerciales (Lima versus Buenos Aires) como clave explicativa de la gradual emergencia de una burguesía comercial nativa. Para Céspedes del Castillo (1946) las concesiones comerciales otorgadas por las Reformas Borbónicas a las regiones periféricas del imperio español (Nueva Granada y Río de la Plata) fueron la consecuencia de la lucha de una burguesía comercial nativa que les disputaba palmo a palmo los privilegios monopólicos a los agentes limeños de Cádiz. Para Arcila Farías, los cosecheros y mercaderes criollos de la Venezuela del siglo XVII, una vez que dispusieron de barcos propios, vieron con hostilidad las naves metropolitanas que tomaban carga para Veracruz y trataron de entorpecer su comercio, hasta finalmente lograrlo e imponerse en el mercado mexicano. Más luego, en el siglo XVIII, Aizpurúa (1985) y Domínguez (1985) nos revelan que dichas rivalidades entre el comercio nativo y los intereses de la Compañía Guipuzcoana se reiteraron.<sup>4274</sup> También, para Gil Munilla (1950), la totalidad de los movimientos revolucionarios hispanoamericanos se explican como resultado del desarrollo de la burguesía en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Asimismo, Hoberman (1991) probó como los comerciantes mayoristas de la ciudad de México, ya a comienzos del siglo XVII, usaron de su acceso privilegiado a la plata y al crédito para independizarse de las casas mercantiles de Sevilla; y Pérez Herrero (1988) sostuvo que la manipulación de libranzas y letras combinadas con el control sobre la acuñación de moneda les permitió a los mayoristas locales preservar en el siglo XVIII su centralidad en la circulación de bienes y numerario.<sup>4275</sup> La historiadora brasileña Lahemeyer Lobo (1985) sostiene que la burguesía mercantil del Brasil atacó el régimen monopolista de flotas al igual que condenaba el abuso en la elevación de los precios de mercancías y fletes, así como la preferencia por las embarcaciones de mayor porte y la extrema demora con que las flotas procedentes de Lisboa arribaban a Bahía.<sup>4276</sup> Para Ramos Pérez (1967), los productores de trigo chilenos observaban con disgusto como las naves limeñas tomaban en Valparaíso carga para el Callao y trataron de intervenir en el tráfico, hasta lograr controlar parcialmente el mercado peruano. Los historiadores Floyd (1961) y Lindo-Fuentes (1984) aseguran que los productores de índigo salvadoreños y hondureños veían asimismo con resentimiento como los comerciantes residentes en Guatemala controlaban el tráfico de índigo imponiendo sus precios de monopolio. A su vez, en su estudio sobre Guatemala, Martínez Peláez (1971) descubre que el embrión pequeño-burgués estaba integrado por los comerciantes que no se beneficiaban con el monopolio y que no gozaban de relaciones exclusivas con las casas españolas, y que por eso mismo se hallaban en un plano de desventaja frente a las mismas.

Pero es recién con Wedovoy (1955, 1960) que se logra identificar con precisión la emergencia de la burguesía nativa. Para Wedovoy, inspirado en Groethuysen (1943), una burguesía comercial autónoma de las casas comerciales gaditanas es aquella que trabajaba por su propia cuenta y con capitales propios y no como meros comisionistas o habilitados, como los “comerciantes” monopolistas, dueña o arrendataria de barcos de ultramar o de cabotaje, que importaba esclavos, que contrataba seguros marítimos, que se lanzaba a realizar un comercio activo y no pasivo como el de los monopolistas, y que practicaba el comercio triangular con África y Brasil. Más aún, con la frustrada industria de la salazón de carnes, esta incipiente burguesía reveló también pretender ser una embrionaria burguesía industrial. No sólo poseyó capital, vinculación con los mercados proveedores de los insumos requeridos, y relación con los mercados de consumo, sino también, al decir de Wedovoy, factores de naturaleza psico-sociológicas tales como espíritu de iniciativa, riesgo, orden, economía, y organización, y factores de orden técnico tales como el conocimiento del cálculo mercantil y contable.

Las posiciones de Wedovoy generaron inmediatas reacciones de parte de las diferentes corrientes marxistas. Por un lado, la corriente modo-produccionista (Kossok, 1959; Romano, 1966; Carmagnani, 1976) niega que en el período pre-revolucionario existiera el dominio económico-social de una incipiente burguesía comercial y, por el contrario, afirman que dicho dominio correspondía en ese entonces a una clase feudal que recién alcanza el poder político luego de las guerras de independencia. Otros autores, afirman que la fuerza dominante partidaria del comercio libre estuvo constituida en el Río de la Plata no por una supuesta burguesía comercial, sino por ganaderos, los cuales subordinaron a fines del siglo XVIII tanto a los labradores como a los comerciantes (Iglesias, 1956). Para esta tendencia, la lucha contra el feudalismo exigía no un desarrollo de una burguesía comercial nacional sino el desarrollo agrícola como etapa previa para impulsar el mercado interno, crear una burguesía agraria, y engendrar algún desarrollo manufacturero (Paso, 1975). El interés de una burguesía comercial opuesta al monopolio no podía, según esta tendencia, ir más lejos que el de desear la expansión de su mercado interno y no sería prudente asignarle, como lo hace Wedovoy, el papel de “organizar racionalmente la economía...desarrollando la producción mediante el fomento de las industrias propias del país”.<sup>4277</sup>

Estas interpretaciones, amén de padecer de una concepción puramente lineal del proceso histórico, adolecen de una incongruente visión retrospectiva al proyectar hacia el pasado pre-revolucionario una hegemonía ganadera que se dio recién muy entrado el siglo XIX. Por otro lado, estas interpretaciones desconocen el rol cumplido en la historia por la producción y circulación desarrollada de mercancías llevada a cabo por las burguesías comerciales nacionales las cuales, al acelerar el proceso de diferenciación social y formar, al decir de Marx, las premisas históricas en que surge el capital, se constituyeron en pre-requisitos ineludibles de toda revolución burguesa.<sup>4278</sup>

Por otro lado, las corrientes circulacionistas derivan una tesis semejante. Para Peña (1970), una burguesía fundada en la existencia de un mercado interno nacional –no puramente local—que tuviere urgencia por aplicar sus capitales a la industria, indispensable para engendrar una revolución democrática-burguesa, era inexistente en América Latina en los tiempos de la independencia. Si bien reconocen que hubo burguesía, aclaran que fue casi exclusivamente comercial e intermediaria en el comercio extranjero, o sea a criterio de Peña, eminentemente portuaria y antinacional. Más aún, para Peña, quien en esto coincide con Zorraquín Becú, nadie en América Latina en tiempos de la independencia tenía interés en expropiar a las antiguas clases dominantes, o en modificar las relaciones de propiedad, y menos que nadie la burguesía comercial. Ello es cierto, en la medida que la burguesía comercial nativa no tenía por enemiga en el Río de la Plata a la clase terrateniente, que por su exiguo poder económico no era considerada en ese entonces una clase dominante, pero falso si por enemigo se tenía a los comerciantes monopolistas, la mayor parte de ellos propietarios y especuladores de mano de obra esclava, muchos de los cuales fueron confiscados y algunos hasta fusilados por los sucesivos gobiernos revolucionarios. Finalmente, parece deducirse de la expresión citada que, para Peña, liberar a los negros de la esclavitud y a los indios de la mita, modificar las relaciones de circulación y ratificar la quiebra del monopolio mercantil de Cádiz, carecía de entidad revolucionaria.

De ser las tesis de Frank y Peña válidas, resultaría que la revolución de independencia habría propuesto el absurdo de perpetuar las condiciones del subdesarrollo,

al elegir como elite dominante a una burguesía que por haber estado desde siempre ligada a la metrópoli colonial sólo podía prolongar y acentuar el subdesarrollo. De ahí que para Frank y Peña el fracaso de las revoluciones resultaría simplemente algo fatal y predestinado.

Pero no sólo las tesis circulacionistas de Frank y Peña ignoraron la existencia incipiente de una burguesía comercial autónoma de las casas metropolitanas de Cádiz descritas por Wedovoy, sino también aquellos que, como Assadourian, las combatieron encarnizadamente. Para este último la quiebra del sector externo cuyo control monopolístico ejercía el capital comercial metropolitano “no promueve efectos secundarios mecánicos de signo positivo en el resto de la economía que se exprese cuantitativamente en el aumento global de la producción y en la diversificación de la economía”. Según Assadourian, el cierre de los mercados externos malogra el único circuito donde los que componen el grupo dominante en la región satélite (los agentes del capital monopolista) pueden crear y realizar el excedente. La consecuencia visible de esta crisis consistiría en el deterioro de la capacidad para importar, y por lo mismo, una notable tendencia a la disminución de los intercambios en el mercado interno.<sup>4279</sup>

Estos argumentos carecerían de seriedad al no plantearse la cuestión de la existencia, aunque incipiente, de una burguesía comercial, verdadera portadora de la simiente revolucionaria, y confundir a esta última con los agentes comerciales de los monopolios gaditanos. Esta burguesía comercial frustra su proyecto de independencia económica no por ser cómplice de la metrópoli colonial sino por no haber alcanzado una suficiente acumulación mercantil para hacer viable su proyecto. La debilidad de dicha embrionaria burguesía habría impedido que la revolución de independencia adoptara un programa burgués y, con ello, un contenido firmemente anti-monopolista y anti-latifundista, limitándose sin embargo a expresar solamente un contenido anti-clerical e hispanóphobo. Dicha debilidad será el obstáculo principal a la hegemonía burguesa en el desarrollo del movimiento anti-feudal. A la debilidad de dicha burguesía anti-feudal se correspondió también la progresiva hegemonía de una clase terrateniente, lo cual explica, al decir de Semo (1978), el porqué la revolución de independencia en la América Latina es, en su contenido anticolonial, victoriosa, y en su contenido burgués, inconclusa.<sup>4280</sup> A diferencia de Europa, donde existieron según Marx dos caminos para transitar el pasaje del feudalismo al capitalismo; en regiones coloniales periféricas escasas de población, abundantes en tierra libre, y carentes de artesanía y manufactura vernáculas tales como el Río de la Plata, en lugar de que el productor agrícola o ganadero se convierta en comerciante y capitalista, lo cual habría constituido un camino revolucionario al estilo de las vías inglesa, francesa y prusiana de revolución burguesa, los comerciantes nativos se subordinaron a los nuevos importadores extranjeros y los ex agentes del monopolio gaditano comenzaron a apoderarse directamente de la producción agrícola y ganadera para reproducir las viejas relaciones feudales de producción, consumir un compromiso histórico con la clase terrateniente, y frustrar así toda perspectiva de pasaje revolucionario del feudalismo al capitalismo.

Pese a la importancia de la tesis de Wedovoy, la existencia de una incipiente burguesía comercial nacional capaz de desafiar a la metrópoli española también queda oscurecida en la reciente historiografía de América Latina colonial (Johnson, 1974; Socolow, 1978). Al concentrarse en los extremos de la estructura social (comerciantes comisionistas y artesanos) Johnson y Socolow eluden el quid de la cuestión. Por otro lado, para Socolow, la naturaleza innovadora de los mecanismos comerciales adoptados por la

burguesía comercial porteña no sirve para medir el éxito o fracaso de un proyecto económico. Según Socolow (1978), el éxito o fracaso de una burguesía mercantil se debe valorar por las fuentes de su reclutamiento, el grado de apertura del grupo social, y la tasa de movilidad intra o intergeneracional de los miembros del grupo y no por la naturaleza de los mecanismos comerciales adoptados por dicho sector, tal como lo pregona Wedovoy (1960). Por último, para Galmarini (1980), mal podría haber existido una burguesía comercial autónoma de las casas metropolitanas de Cádiz si esta burguesía estaba ligada al aparato del estado colonial. La concesión de monopolios para la explotación de la ballena, el transporte del azogue, y la venta de carnes saladas a la Flota Real a ciertos comerciantes, reputados por Wedovoy como burgueses, invalidaría dicha tesis. Sin embargo, para Wedovoy (1960), parecería que la clave de la caracterización no debe buscarse ni en los orígenes sociales de dichos burgueses ni en sus relaciones privilegiadas con la burocracia colonial inaugurados por dichos comerciantes.

Wedovoy (1966) observó también como del antiguo mercader que reunía en su persona las condiciones de comerciante, transportista y asegurador van surgiendo con el correr del tiempo especializaciones, divisiones o diferenciaciones del trabajo, en la esfera de la circulación, cada vez más detalladas e independientes las unas de las otras, al extremo que los comerciantes fueron progresivamente independizándose de sus responsabilidades, adquiriendo mediante la paga de fletes y primas los servicios de transportistas y aseguradores. Apuntalando la importancia de los mecanismos de comercialización Wedovoy (1966), refutado luego por Halperín Donghi (1972), atribuyó la presencia de la institución del seguro en Buenos Aires a una supuesta madurez de las condiciones económicas del Río de la Plata, y por consiguiente, a una madurez de una burguesía comercial local, que hacía que la garantía de los préstamos marítimos se desplazara de los navíos a la mercancía misma, independizando a los comerciantes de los transportistas y los aseguradores. Por último, con la frustrada industria de salazón de carnes, esa incipiente burguesía rioplatense reveló también, al decir de Wedovoy, la pretensión de ser una embrionaria burguesía industrial.<sup>4281</sup>

Finalmente, Winius (1985) sostiene --al referirse al imperio portugués— que desde la conquista constituía una talasocracia, donde sus ganancias eran absorbidas principalmente por la corte y la aristocracia. Por el contrario, el caso español, si bien en sus comienzos constituyó una talasocracia, desde el fiasco de la Armada Invencible (1588) y más aún, a partir de la Independencia de Portugal (1640), su condición de tal quedó seriamente deteriorada.<sup>4282</sup> Ello no habría impedido que en su propia órbita fueran generándose talasocracias subalternas, de índole fluvial o marítima, tales como la de Nueva Orleáns en la cuenca del Mississippi, las de Veracruz y La Habana en el Golfo de México, la de Cartagena en el Mar Caribe, las de Valparaíso, Lima, Panamá y Acapulco en el Pacífico, la de Manila en el sudeste asiático, y las de Buenos Aires y Montevideo en el Río de la Plata.<sup>4283</sup>

## **Epílogo Sección II-D**

Con relación a la fragmentación gremial del orden monopolista, no cabe duda que el impacto de las guerras provocado por la revolución francesa incidió en la conformación de un atisbo de emergencia de una clase mercantil autónoma de las casas monopolistas de Cádiz.

## **Sección II-E            Descomposición social del orden esclavista.**

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal, estamental y monopolista, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas de naturaleza señorial y esclavista, que tratamos en dos sucesivos capítulos: la fuga esclava y la resistencia rutinaria y cotidiana; y el cimarronaje, el bandolerismo y el mito de la docilidad esclava.

### **Capítulo II-E-12                    Fuga esclava y resistencia rutinaria y cotidiana.**

#### **Índice**

- K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava
- K-II Frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.
- K-III Reincidencia del esclavo en la fuga.
- K-IV Prolongación de la fuga en el tiempo.
- K-V Seriedad de las razones culturales, económicas y familiares. aducidas para la fuga.
- K-VI Urbanizaciones forzadas.
- K-VII Grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.
- K-VIII La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a linajes.
- K-IX Rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.
- K-X Recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la fuga
- K-XI Consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su rápida individualización

#### **Introducción del capítulo II-E-12**

En ese sentido, nos proponemos en este trabajo, continuación de otros anteriores,<sup>4284</sup> encarar la realidad de la región conocida como el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella la cotidianeidad y naturaleza rutinaria de la fuga de esclavos tomando en consideración para ello algunos elementos que desmienten el mito de la docilidad del esclavo Rioplatense:

- a) la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos;
- b) la reincidencia del esclavo en la fuga;
- c) la prolongación de la fuga en el tiempo;
- d) la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga;
- e) el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga;
- f) la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización;
- g) el rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos;

h) el recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la fuga;

e i) la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su rápida individualización.

## **K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava**

En este capítulo trataremos de probar, fundados en trabajos de S. Stern (1984,1985) y de A. Knight (1990), que las aproximaciones mercado-internistas (economicistas) ensayadas por Assadourian (1973,1983) y Garavaglia (1973); centradas en las crisis comerciales o las aproximaciones 'estatistas', centradas en las crisis fiscales y en la corrupción de las élites, ensayadas por Skocpol (1979) y Trimberger (1978), para explicar las revoluciones en general, y por Pietschmann (1982) y Andrien (1984), para explicar las causales de la revolución en la América Latina de comienzos del siglo XIX, no pueden dar cuenta cabal y completa de porque la Revolución de Independencia ocurrió, ni porque ocurrió cuando y donde lo hizo.<sup>4285</sup> Asimismo, trataremos de probar que al igual que lo sustentado por Scott (1985) y a diferencia de lo afirmado por Patterson (1981), como leyes generales para cualquier lugar o región, la fuga de esclavos en el Río de la Plata, como herramienta cotidiana de resistencia, fue por el contrario muy factible y bastante generalizada. Para Patterson, las fugas y revueltas esclavas eran más factibles donde se cumplieran los requisitos siguientes: 1) los esclavos fueren numéricamente superiores a la clase de los amos; 2) los esclavos fueren mayoritariamente bozales o recién llegados de África y del mismo origen étnico; 3) las condiciones geográficas fueren más favorables (serranías, bosques, etc.); y 4) la economía estuviere monopolizada por grandes propietarios ausentistas de una muy baja cohesividad.<sup>4286</sup> Sin embargo, para el caso del Río de la Plata, he podido comprobar que sus hipótesis no se ajustaban a la realidad allí vivida. Si bien los esclavos eran numéricamente inferiores a la clase de los amos, los fugados eran mayoritariamente mulatos o pertenecían a etnias distintas, las condiciones geográficas no eran favorables para la fuga, y la economía no estaba monopolizada por grandes propietarios ausentistas que carecieran de cohesividad, las fugas de esclavos en el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata resultaron igualmente factibles y frecuentes.

## **K-II La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.**

La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos en el Río de la Plata oscilaba con diversos factores, destacándose entre ellos los económicos y los culturales. El cálculo de los esclavos fugados en todo el espacio colonial es una tarea casi imposible de realizar. Para ello habría que recoger la información correspondiente que existe en todos los poderes para cobrar esclavos fugados librados notarialmente en cada cabecera de provincia. Si bien la legislación establecía que el amo que sufriera la fuga de su esclavo estaba obligado a denunciarla, por cuanto de lo contrario se haría responsable de los crímenes que este pudiere practicar durante y con posterioridad a su fuga, la estadística notarial debe ser necesariamente muy incompleta. Esta incompletud obedecía a que en la mayor parte de los casos los amos no reportaban notarialmente la fuga de sus esclavos, especialmente si la fuga ocurría en las regiones rurales. Por ello, en este trabajo me reduje esencialmente a cuantificar sólo la masa de esclavos fugados de Buenos Aires al interior del espacio colonial, sin perjuicio de intentar iniciar una somera muestra de los fugados desde el interior en dirección a Buenos Aires. En efecto, los que escaparon de Buenos

Aires hacia el interior del espacio colonial, de acuerdo a los poderes especiales para cobrar, alcanzaron entre 1708 y 1819 a 384 casos. En las Tablas R-I y R-II listamos los 384 esclavos fugados de Buenos Aires, con la connotación de la casta, el sexo, la edad, el nombre, el destino aparente de la fuga, y la identidad alfabetizada de los poderdantes y los apoderados. Del universo de los esclavos prófugos registrados en esta muestra el 71% correspondió al llamado sexo "fuerte", 305 varones; el 24% al llamado sexo "débil", 68 "hembras"; y menos del 3%, a individuos cuyo sexo no pudimos identificar. En cuanto a la casta el 53% correspondió a los negros (206 morenos) --de los cuales 12 eran bozales; el 35% a los pardos (138 mulatos); el 10% a fugitivos cuya casta no nos ha sido posible identificar; y menos del 1% a los zambos. También hallamos entre los fugitivos a numerosos artesanos, contándose entre ellos a 9 zapateros, 5 barberos, 4 albañiles, 3 herreros, 2 sastres, 2 carpinteros, 2 peones, 2 domadores, 1 pintor, 1 sombrerero, 1 talabartero, 1 violinista, y 1 cocinero.

No obstante las dificultades existentes para calcular la totalidad de los esclavos que se fugaban del interior del espacio colonial y que concurrían a la plaza porteña para conchabarse por un jornal, hemos logrado relevar de las compraventas escrituradas en los protocolos porteños, en la Tabla R-III, medio centenar de esclavos procedentes del interior, cuya compra-venta y/o manumisión notarializada delataba la naturaleza huidiza del esclavo. De este medio centenar, la mayoría (37) fueron varones mulatos y solo una minoría del 20% fueron varones negros. Las mujeres esclavas procedentes del interior prácticamente no estaban representadas, pues sólo dos de ellas alcanzaron a quedar registradas como huidizas. Por el contrario, las mujeres esclavas prófugas procedentes de Buenos Aires en fuga hacia el interior fueron relativamente más numerosas, alcanzando como hemos visto antes, al 24% del total, 68 hembras sobre 305 varones. La fuga de las mujeres se concretaba a través de las flotas de carretas, convirtiéndose en volantonas, las actuales ruterías.<sup>4287</sup> De los 52 esclavos fugados del interior, el record lo llevó Mendoza con 18 esclavos fugados, todos ellos mulatos, siguiéndole en la estadística Córdoba con ocho esclavos fugados. Si bien de Tucumán, nuestra muestra trae sólo dos mulatos fugados, sabemos por el trabajo de Zerda de Cainzo (1973), que proliferaban a fines del siglo XVIII las demandas judiciales iniciadas por esclavos mulatos en busca de su propia manumisión y la de sus parientes, y que en 1812 los censos de varios cuarteles de la ciudad cabecera mostraban una abrumadora mayoría de pardos o mulatos por encima de negros o morenos.<sup>4288</sup>

Si al medio centenar de esclavos fugados detectados en las compra-ventas y manumisiones de esclavos registradas en Buenos Aires sumáramos los esclavos huidizos vendidos o manumitidos en las escribanías de las demás cabeceras de provincia, así como los numerosísimos esclavos mulatos comercializados notarialmente en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII, que denuncian haber sido adquiridos por compra-venta extra-judicial, obtendríamos la tan anhelada estadística de la totalidad de los esclavos fugados del interior. Por extra-judiciales se entendían todas aquellas transacciones que se registraban ante papel simple y que por diversas razones no pasaban por ante escribano de número, operando como una suerte de mercado negro. Las adquisiciones extra-judiciales solían ser legitimadas posteriormente mediante transacciones notariales, las que operaban como un blanqueo de la mano de obra esclava fugada. Por ejemplo, de los 187 esclavos comercializados en Buenos Aires en 1790, 36, o el 19%, fueron adquiridos por compra-venta extrajudicial. De los 188 esclavos comercializados en 1795, 27, o el 14%, fueron adquiridos extra-judicialmente. Y de los 203 esclavos comercializados en 1800, 62, o el 30%, fueron adquiridos extra-judicialmente.<sup>4289</sup>

La responsabilidad por la fuga de los esclavos se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en cuenta que de los 384 poderes librados, 324 poderdantes, o la absoluta mayoría de un 84%, libraron un solo poder; 38 poderdantes, o casi el 10%, libraron dos poderes; 12 otorgaron tres poderes; 6 lo hicieron cuatro veces; dos lo otorgaron cinco veces; y uno solo, el comerciante negrero y mecenas de la Iglesia Juan de Narbona,<sup>4290</sup> lo otorgó seis veces. La responsabilidad por la recuperación de los esclavos prófugos también se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en cuenta que de los 384 poderes librados: a 331 apoderados, o la absoluta mayoría de un 86%, les fueron adjudicados un solo poder; a 37 apoderados les fueron adjudicados dos poderes; a 10 apoderados les fueron adjudicados tres poderes; y a 5 apoderados les fueron adjudicados cuatro poderes.

### **K-III La reincidencia del esclavo en la fuga.**

La frecuencia de la institución de la fuga en el Río de la Plata se verifica con la reiteración de los poderes librados notarialmente. Estos variaban por diversos motivos, pudiendo ser también un índice de su propia inocuidad. La excesiva demora en retornar de la fuga, la ignorancia del lugar donde podría haber recalado el esclavo en su fuga, o la indispensabilidad del esclavo para el amo solía engendrar en éste último dobles o triples poderes. Ignacio Justo de Jibaja, hacendado cordobés, libró poderes primero en 1725 a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego en 1727 a favor de Juan Tello de Meneses, vecino de San Juan, por la recuperación de su esclavo mulato Felipe, de 20 años de edad.<sup>4291</sup> El hacendado del pago de los Arrecifes Baltasar de Quintana Godoy libró poderes: primero a Córdoba en 1728, dirigida a Juan de Argüello, y luego en 1729 a Santiago del Estero, dirigida al Teniente Gobernador José de Aguirre, para vender el mulato Bernardo, de 24 años, "...de buena estatura, color pardo y tiene dos dedos de la mano derecha cortados de un laso...que tengo noticia está en la estancia de los [Cevallos] Morales".<sup>4292</sup> Y Tomás Baraona otorgó sendos poderes primero en 1762 a José Cano Cortés, vecino de Córdoba, y luego en 1765 a Pedro de la Torre, también vecino de Córdoba, para recaudar el negro Manuel, de nación Mosambique, "...que me urtaron desta ciudad ace 12 a 14 años".<sup>4293</sup>

### **K-IV La prolongación de la fuga en el tiempo.**

La prueba de lo generalizada que estaba la fuga, está en los poderes notarializados los cuales operaban como ordenes de cobro, librándose sólo para recaudar en dinero cantante y sonante el valor monetario del esclavo prófugo. En 1797 Manuel Alais otorgó un poder a Pedro Begallo para cobrar de Juan Antonio Magariños, vecino de Montevideo, \$200 valor del mulato Mariano, al Maestro barbero Fernando Arévalo.<sup>4294</sup> En otros casos de fugas prolongadas, aparte de los esclavos prófugos, se cobraban los jornales devengados durante su ausencia. En 1765 Francisco Antonio Tavora otorgó un poder a Domingo Martínez para recoger al mulato Cipriano, zapatero, y al negro Grecia, sacador de madera, "...que paraban en poder de José Antonio Brito mi apoderado y asimismo percibirán los jornales que estos ganaren".<sup>4295</sup> En 1808 Gaudencio Noble, otorgó un poder a Francisco de Paula Ortiz, de viaje para el Paraguay, para solicitar un mulato Mariano, de 28 años, de oficio zapatero, originario de Asunción "...como también los jornales que hubiese devengado en cerca de cuatro años que anda fugitivo".<sup>4296</sup> En 1814 el maestro herrero Pablo José Lorence,<sup>4297</sup> otorgó un poder a Nicolás Ezequiel Azcoeta, vecino de Córdoba, para "...recaudar el negro zambo Jorge huido en aquel destino a quien en caso de tener bienes le hará cargo de los jornales de 2 1/2 años [de ausencia]".<sup>4298</sup> En otros casos menos

numerosos, y tratándose específicamente de esclavas hembras, a más de los jornales devengados durante la ausencia de la esclava fugada se cobraba la eventual cría que las mismas esclavas pudieran haber engendrado durante su fuga. En 1813 Francisco Antonio de Letamendi, otorgó un poder a Juan Nicolás de Avellaneda y Tula, vecino de Catamarca, para cobrar los esclavos Salvador, su mujer María Francisca y su hijo Manuel, y los "...demás [críos] que han tenido durante su fuga".<sup>4299</sup>

La reincidencia y práctica rutinaria del esclavo en el mecanismo de la fuga variaba según la calidad del amo, y según la edad, vicios y tachas del esclavo. No todos los esclavos reincidían en el delito el mismo número de veces. Existían esclavos que habían fugado una sola vez en su vida y otros que hacían de esta práctica una rutina. Si consideramos que este recurso no era gratuito, pues quedaba consignado notarialmente, como una suerte de prontuario, y entraba a jugar de estigma o antecedente desacreditante en la evaluación que el mercado de mano de obra podía hacer de él, comprenderemos el porqué de su importancia social. El barbero mulato Bernabé, de más de 30 años de edad, fue vendido en 1815 con la aclaración de haber "...echo algunas fugas".<sup>4300</sup> El negro Pedro, de 20 años de edad, fue vendido en 1788 por María Isabel Salas al Dr. Benito de la Mata Linares en \$300, con la aclaración que "...se le huyó una vez al Puerto de las Conchas y otra al Alcalde Manuel Antonio Warnes solicitando papel de venta".<sup>4301</sup> El mulato Antonio, la negra Isabel, la negra Juliana, el negro Juan Manuel, el negro Manuel, la negra Teresa y el negro Francisco fueron vendidos en 1787, 1790, 1795, 1804, 1812 y 1817 respectivamente, con la advertencia de haber huido en tres ocasiones distintas.<sup>4302</sup> El mulato Mariano, de 19 a 20 años de edad, hijo de Quiteria, fue vendido en 1790 por María Josefa López al Virrey Nicolás Arredondo, con la aclaración que "...en cinco o seis ocasiones se me a huido de mi poder".<sup>4303</sup> El mulato Francisco, de 17 años de edad, fue vendido en 1797 por el gaditano Francisco X. de Bares a Antonio Amoda en \$240 con la advertencia que

"...en algunas ocasiones que le he querido castigar se ha salido de mi casa a buscar empeño en alguna otra de mis conocidos y luego ha buuelto con padrino y aún solo también y que una o dos noches con tal de que no le castigase se fue por el tejado en el que se quedó hasta la mañana siguiente que volvió con Padrino".<sup>4304</sup>

Para enfatizar la índole manera de este esclavo, Bares señalaba que en otra ocasión, ocurrida hacía tres años, el mulato Francisco "...tomó un real de una barbería se fue y lo gastó en pasas y que en otra ocasión pasando por baxo de Portales [del Cabildo] le encargó un preso le alcanzase medio real de pan y tomando la moneda se fue con ella".<sup>4305</sup>

La prolongación de la fuga en el tiempo variaba según cual hubiere sido el motivo de la misma. No todas las fugas contaban con la misma duración. Había fugas más o menos esporádicas que duraban una sola noche, que hoy se las conoce como ausentismo; otras transitorias, que duraban días o semanas, y que podían seguir una estrategia de escalada o de presión sobre el amo para lograr ciertas reivindicaciones individuales; y otras mucho más prolongadas, que duraban meses o años, y que en muchos casos se volvían vitalicias o definitivas. La negra Antonina, de 21 años, fue vendida en 1786 "...con el defecto de ser callejera, esto es que se sale de casa a pasear o se demora quando la imbian a la calle".<sup>4306</sup> El carpintero mulato Manuel, de 25 a 30 años de edad, fue vendido en 1784 por Nicolasa Olivares a Raymundo Mariño en \$360, quien lo recibía preso

"...por el libertinaje con que vivía sin pagar ni darme jornales ningunos de modo que se pasaban los 15 días y un mes o más sin parecer por mi casa".<sup>4307</sup>

Y el negro Pedro, de 21 años, fue vendido en 1798 por el Deán de la Catedral Dr. Miguel Escudero a Isidro Fernández

"...no obstante la falta que me hace en el servicio manual, porque como está en los fervores de la juventud, vive inquieto por la hija de Adán, y como nuestros corrales no tienen cercas le es fácil aprovechar las ocasiones de prima noche, especialmente quando yo desde las oraciones me recojo: y aún de día sabe él, que quando estoy en la Iglesia, o rezo el oficio divino, tiene esos intervalos para correrla".<sup>4308</sup>

La existencia de fugas prolongadas las conocemos porque en esta materia no regía la prescripción en favor del esclavo, no importando cuán remota en el tiempo fue una fuga para que su amo tuviere derecho a reclamar la recuperación de su dominio. El negro Francisco, esclavo de Margarita de Herrera, huyó a Mendoza en 1713, y seis años después "...cuando tuve noticia de él escribí al R.P. Julián Portillo, S.J. para que lo vendiese".<sup>4309</sup> Del mulato Felicio, de 25 años, su amo denunciaba que "...hace ya siete años que se huyó de mi poder".<sup>4310</sup> Y del negro Manuel, de nación Mozambique, de 10 a 11 años de edad, la escritura revela que estaba en 1762 "...fugitivo desde 1752 [prácticamente desde que nació]".<sup>4311</sup>

#### **K-V La seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga.**

La seriedad de las razones culturales alegadas por los esclavos para fugar variaba en cada caso en particular. El miedo al castigo, el mal trato, motivos personales o familiares, y en algunos casos, el simple deseo de no estar atado a sujeción alguna, por más buen trato que se les dispensase, eran las razones más usuales. Mayo (1985a) relata el caso patético, no exento de una esquizofrenia colectiva, de un negro esclavo que se refugió en las tolderías Pampas porque su amo lo encerraba todas las noches en un cuarto para impedir que se casara, mientras que simultáneamente el cura se negaba a confesarlo hasta tanto no se casara.<sup>4312</sup> Entre los motivos por los que los esclavos varones o hembras huían también contaban el llamado familiar, la urbanización o ruralización forzada, el robo, el malón o el naufragio. Cuando un esclavo fugaba a su lugar de origen ello obedecía simplemente a que no eran capaces de sufrir una separación forzada.<sup>4313</sup> En 1729, el mulato Domingo, de 30 años, se fugó a Salta, a "...casa de los herederos de Julián Ramos, quien fue padre de dicho mulato".<sup>4314</sup> En 1760 dos mulatos, Juan José y Juan Antonio, se fugaron al Tucumán, donde Gregorio Morel "...los ubo y compró de Juan Tomás López de Velazco, cura que fue del beneficio de Cochinoca, de la Provincia de Tucumán".<sup>4315</sup> En 1785, la mulata Jacoba Paz, de 42 años, hija natural de un miembro de la familia Paz de Figueroa, se fugó a Santiago del Estero.<sup>4316</sup> También fue el caso de la negra María Catalina, la cual recurrió en 1801 al alcalde quejándose de que su amo Antonio Miró no le permitía casarse con un negro.<sup>4317</sup> En forma similar, en 1800, un mulato llamado Juan, de 17 años de edad, fue vendido con una carta de su antiguo amo, detallando que su esclavo era un jornalero rural, "...acostumbrado al lugar donde reside su madre, por lo que temo que algún día habrá de fugar".<sup>4318</sup> En 1811 José Díaz otorgó un poder al Teniente de Caballería de Santa Fé Miguel Gerónimo Cabral para recobrar al negro bozal Antonio, quien se hallaba "...desposado con criada de Vicente Roldán [vecino de Santa Fé]".<sup>4319</sup> Y en 1812 el maestro herrero Pablo José Lorenze,<sup>4320</sup> otorgaba un poder a Benito Isidoro

Martínez, vecino de Córdoba, "...para recaudar el negro Jorje, albañil, que se halla en Córdoba donde es casado".<sup>4321</sup>

## **K-VI Las urbanizaciones forzadas.**

Las urbanizaciones forzadas muchas veces contaban como motivo de fuga. El mulato Mariano, que había sido donado por el hacendado Estéban García de Zúñiga a su sobrino el Dr. Agustín Pío de Elía, demandó a este último en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, exponiendo "...que no quería servir a dicho Doctor, sino que más bien le vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia".<sup>4322</sup> Pese a que el juez

"...le hizo presente que su amo no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido, pues no quería dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don Estéban García de Zúñiga",<sup>4323</sup>

el esclavo Mariano

"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le conchabase, y que ni quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve tratase de venderle su amo a un estanciero u otro que tuviese ejercicio de campaña, porque era lo que le acomodaba".<sup>4324</sup>

Finalmente, el Dr. Elía resolvió venderlo al hacendado Agustín Wright,<sup>4325</sup> antes que su esclavo recurriese a la fuga.

El naufragio era otro de los motivos que provocaba la fuga. En 1808 José Roland otorgó un poder a Félix Sáenz de la Maza, vecino de Montevideo, para cobrar cinco esclavos bozales "...que se profugaron en años pasados con motivo del naufragio de la fragata Adeleyra procedente de Lisboa, cerca de la Costa de la Ballena".<sup>4326</sup> El haberse quedado un esclavo con los jornales sin dar participación de los mismos a su amo era motivo de fuga. El negro Pedro, de nación banguela, de 26 o 27 años, tenía "...contra sí el haber echo uso de ciertos jornales que ganó en su ejercicio de albañil y de cuyas resultas se profugó".<sup>4327</sup>

Muy a menudo las celosas restricciones impuestas por los amos a sus esclavos durante el tiempo ocioso y los días festivos --las que obedecían a la necesidad de que la productividad y los jornales a cobrar no se vieran afectados-- eran motivo de fuga. El barbero mulato Andrés, de 30 años de edad, se había fugado debido a que su amo, el Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez, le contenía "...los pasos que hacía de noche, quedándose fuera de mi casa".<sup>4328</sup> El negro Marcelino, de 22 años de edad, quien huyó de casa de Salvador Escolá

"...en marzo de 1800 por temor del castigo que se merecía por presunciones nada equívocas de que las salidas que hacía de noche a deshoras eran para ir a sus devaneos y enamoramientos".<sup>4329</sup>

En otro caso relacionado con la negra María del Rosario, de 20 años de edad, su previo amo José Ramírez, residente en Corrientes, confesaba en 1804 que la circunstancia de tener la negra "...a dormir debajo de llave ha sido la causa de su trastorno, porque no quiere la opresión cristiana, sino la libertad de conciencia".<sup>4330</sup> Aparentemente la fuga se hallaba justificada a los ojos de la ley cuando estaba causada por el mal trato, pero no cuando

obedecía al vicio. La mulata María Josefa, de 30 años de edad, se fugó en 1800 "...por mal trato que se le daba y no por vicio".<sup>4331</sup> El vicio como causa de fuga era percibido como producido por la vagancia. En 1790 María Josefa López vendió al mulato Mariano, de 19 años de edad, al Virrey Nicolás de Arredondo, denunciando en la escritura que las fugas "...lo atribuyo hayan sido causa de lo aragán que estaba en mi casa".<sup>4332</sup>

#### **K-VII El grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.**

Otro de los numerosos motivos de fuga era la huida involuntaria, o robo de esclavo. Soares (1989) explica el tráfico interno paralelo a partir del robo de esclavos, y Petit Muñoz (1947), describe este fenómeno vinculándolo con el contrabando de tabaco desde el Brasil.<sup>4333</sup> En 1749, la esclava Josefa Margarita, de 23 años, huyó "...para la Colonia del Sacramento y della pasó a La Rioja llevándola hurtada un indio o mulato".<sup>4334</sup> En 1754 Juan Agustín Cueli, dueño de la chacra conocida como la Pólvara de Cueli,<sup>4335</sup> otorgó un poder a Martín Antonio Perales para recaudar el negro Joaquín de 16 a 18 años "...el cual me hurtaron de mi chacra la noche del 2 de mayo".<sup>4336</sup> En 1756 Bernardo Santos de Perdigón otorgó un poder a Manuel Pardo, de viaje al Perú, para cobrar un mulato llamado Martín, de 11 a 12 años "...perfecto de rostro y aguileño, muy vivo de genio y danzarín, que me han extraído desta furtivamente".<sup>4337</sup> El negro Juan, esclavo de Pedro Nieto, y la negra Brita, esclava de Agustina Manzanares, fueron sustraídas en 1756 por el portugués Manuel de Zavala, "...cuias dos piezas vendió en el Pergamino a Ignacio Arias".<sup>4338</sup> El negro Manuel, de nación Mosambique, le fue hurtado en Buenos Aires en 1762 a Tomás Baraona por algún cordobés.<sup>4339</sup> El mulato oficial sastre Martín José le fue llevado clandestinamente en 1769 a Juan de Matos "...haciéndome sufrir el gravámen y perjuicio por su falta de los jornales que me contribuía".<sup>4340</sup> La negra María le fue robada en 1771 a Manuel Pacheco, "...de la estancia que tengo en el Arroyo de San Salvador, partido de las Vívoras".<sup>4341</sup> Y los negros Juan Antonio y Juan Bautista de 16 a 18 años de edad, le fueron robados en 1783 al comerciante Domingo Belgrano Pérez, residente en Buenos Aires,

"...de una partida grande que tuve y aunque hice fijar carteles porque eran más los perdidos solo parecieron tres, y me han faltado estos dos, que por noticias he sabido que unos ladrones los llevaron y parece haberlos quitado a dichos ladrones un Juez Comisionado de dicha ciudad de Santiago del Estero".<sup>4342</sup>

Pero sin duda, el caso más notorio fue el del negro esclavo Antonio, quien según el Apéndice R-I, fue hurtado en 1796 por Feliciano el Puntano al hacendado Riograndense Francisco Amaro Silveyra.<sup>4343</sup> Como fruto del acuerdo de restitución recíproca de esclavos celebrado en 1773 entre el Comandante del Real de San Carlos Don Nicolás de Elorduy y el Gobernador de la Colonia del Sacramento, Amaro Silveyra pudo recurrir a las autoridades judiciales de Montevideo y Buenos Aires en pos de su esclavo.<sup>4344</sup>

Cuando los esclavos residían cerca de la ribera del Río de la Plata o de la frontera con la Pampa estaban más expuestos al robo practicado por corsarios o por los indios infieles.<sup>4345</sup> En 1814, tres esclavos Benito, Antonio y Joaquín, le fueron robados a Josefa Fernández Noario,<sup>4346</sup> "...de seis que los marinos le robaron de su estancia en el Rincón de Piñero".<sup>4347</sup> En 1758 Juan José Rodríguez Flores,<sup>4348</sup> vecino de Cañada de la Cruz, otorgó un poder a su futuro cuñado Pablo Revolledo, vecino de Concepción, en el reino de Chile,

"...por cuanto en 1742 en la invasión que hicieron los indios infieles en la estancia de mi padre, se llevaron cautivas a más de su hermana Isabel Rodríguez Flores y a

mi sobrina Jacinta Barranco, hija de Ana Rodríguez Flores, a la mulata Francisca y su hija María".<sup>4349</sup>

Y al año siguiente, en 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández otorgaron un poder a Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros

"...que se hayan entre los indios serranos del cargo del Cacique Rafael Yatí para cuio percivo tenemos decreto auxiliatorio de SSa el Sr. Teniente de Rey y Gobernador interino de esta Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de los pagos de la Magdalena y Matanza".<sup>4350</sup>

También era usual que los hacendados le hurtaran a los indios, en los contra-ataques posteriores a los malones, los negros esclavos que formaban parte de su chuzma. En otro trabajo, Mayo (1985b) relata como en 1780 habían llegado al fuerte de Chascomús dos cautivas españolas "...informando que los indios deseaban canjearlas por dos cautivas indias que estaban en poder de los españoles".<sup>4351</sup> Cinco años antes, en 1775, el Alcalde de Hermandad Manuel Pinazo había vendido en \$180 a Marcos González la negra Atanasia, de 30 años de edad, "...que la hube y cogí en buena guerra de los indios infieles Pampas".<sup>4352</sup> Y en 1802, Pascual Godoy, vecino de Mendoza, vendió a Antonio Ortiz el negro Antonio, de 20 años, habiéndolo "...habido de prisionero de guerra".<sup>4353</sup>

Pero no siempre el robo de esclavos por los indios llevaba al cautiverio. En ciertos casos, los indios llegaron a declarar libres a los esclavos cautivados, provocando con ello arduas disquisiciones jurídicas.<sup>4354</sup> En 1737, el asturiano Francisco de Suero y González, como Protector de Naturales, en nombre de María, quien había sido esclava de los herederos del difunto Martín de Escobar, vecino de Santa Fé, petitionó contra Martina de Lísola y Escobar,<sup>4355</sup> que se oponía a la libertad de dicha esclava, otorgada por el Indio enemigo.<sup>4356</sup> Doña Martina aducía que el Indio que la llevó cautiva hacía 16 años,

"...no adquirió derecho a la servidumbre de dicha María y que por no ser justa la Guerra que hacen dichos enemigos no pudo transferirse en alguno de ellos el directo Dominio si no que quiere haya permanecido como una cosa hurtada".<sup>4357</sup>

Por el contrario, Suero alegaba que por haberla preservado el Indio de la muerte cuando mataron a su amo Juan Francisco Escobar,<sup>4358</sup>

"...no se puede ofrecer duda en que el tal cautiverio hizo espirar el dominio de los erederos de dicho Martín de Escobar en la misma forma que si le hubiesen quitado la vida pues moralmente se conoce fue ya muerta en cuanto a la servidumbre de los que entonces la perdieron".<sup>4359</sup>

La Real Audiencia de Santo Domingo sostenía la jurisprudencia que el tránsito de un esclavo por un palenque de cimarrones extinguía para siempre los derechos del amo y hacía del esclavo un res nullius.<sup>4360</sup> Suero en cambio proponía que la duda acerca de la legitimidad del derecho de captura o cautividad que hicieron los Indios Bárbaros se la equiparara con la captura hecha por corsarios o piratas. Lo que los corsarios quitaban por la fuerza a otros "...en 24 horas transfiere el dominio y nadie se opone al [dominio] que adquieren los que se lo quitan a ellos por derecho de la Guerra".<sup>4361</sup> Si transcurrido el tiempo un corsario o pirata diese libertad a un esclavo estando poderoso para negársela y retenerlo, Suero deducía que

"...tan dueño fuera de dicha libertad el libertino como otro qualquiera de los prisioneros a quien el enemigo diese de gracia a él parte de los efectos apresados no haciéndolo a beneficio de quienes habían sido sus dueños sino por usar de liberalidad con aquel a quien subrogaba en su misma posesión".<sup>4362</sup>

Finalmente, Suero solicitó infructuosamente de los Doctores Salcedo y López de Lisperguer que se aplicara esta equiparación a su caso

"...porque el derecho de libertad siempre clama a favor de quien la perdió por injuria de la suerte y quales quiera argumentos contra esto traen en sí violencia por ser la perpetuidad de servidumbre introducida del poder militar a otro civil contra el derecho natural primitivo y superior a todos los establecidos por costumbre".<sup>4363</sup>

Entre los factores económicos que motivaban la fuga se encontraban los ciclos comerciales de expansión y crisis. Al sufrir las barracas y las panaderías los efectos de dichas crisis, los esclavos en ellas conchabados también debieron sufrir las consecuencias. Durante los períodos de guerras internacionales, como el comercio decaía, el transporte terrestre y el almacenamiento de mercaderías y cueros también disminuía, así como la ocupación o conchavo de la mano de obra esclava jornalizada. En dichos períodos la propiedad de mano de obra esclava en manos de pequeños propietarios, como ser viudas y ordenes religiosas, que arrendaban o conchavaban la fuerza de trabajo esclava a las panaderías y almacenes, devenían económicamente muy endebles siendo incapaces de alimentar y vestir a sus esclavos, empujándolos así al artesanado o a la fuga. Como una respuesta a este subempleo los esclavos acostumbraban huir al interior, donde la manufactura nativa --como respuesta a las condiciones económicas de guerra-- solía expandirse y consecuentemente ocupaba a los esclavos fugitivos. Según la Tabla R-IV mientras el número de esclavos fugados de Buenos Aires entre 1778 y 1783 habría alcanzado a 20 esclavos, en el período previo sólo lo habrían hecho 4 esclavos. En forma similar, mientras en el período comprendido entre 1796 y 1800, 19 esclavos habrían fugado de Buenos Aires, en el período de cuatro años que le precedió habrían fugado sólo 12 esclavos.

#### **K-VIII La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a linajes.**

El grado de consentimiento con que contaban los esclavos para la fuga se reflejaba en los diferentes métodos que los esclavos fugados adoptaban para su propia regularización. Los esclavos que fugaban del interior y llegaban a Buenos Aires recurrían por lo general a sólo dos grandes estrategias: o alegaban ser libres, por haber sido previamente manumitidos o descender de manumisos, o venían pidiendo papel de venta. Los que venían a título de libres se conchababan en la plaza, o en el caso de las esclavas mujeres se convertían en las antes mencionadas volantonas. El negro José Antonio, de 25 años de edad, se fugó de Arroyo de la China (costa del Río Uruguay) en 1811, siendo

"...huidor ace cinco años en que se pasó a esta Capital y en ella ha permanecido a título de libre conchabado en poder de la compradora, de donde volvió a huirse asta que lo hice recoger y de orden del Alcalde de primer voto Don Juan de Alagón pasó a la Cárcel y desde allí lo recibió la compradora en aquel entonces de su cuenta y riesgo [entendiéndose por ello el previo abono de los derechos de carcelaje] entregándome al contado \$100 quedando de pagarme el resto pasados que fuesen cuatro meses".<sup>4364</sup>

Los casos más sonados en que se alegó la manumisión fueron los del mulato fugitivo José Guzmán, huído de la finca del Carrascal,<sup>4365</sup> en Mendoza, perteneciente a la Orden de San Agustín, y 28 mulatas mas, quienes habían seguido un frondoso litigio ante la Real Audiencia de Buenos Aires. En este litigio los mulatos cuyanos alegaban la pertenencia a siete líneas sucesorias de una misma cabeza genealógica, ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se remontaba a la manumisión de Antonio, un albañil esclavo, hecha en 1647 por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo, con la condición de construir la Iglesia del Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín.<sup>4366</sup>

Los que pedían papel de venta, alegando mal trato en el lugar de origen, por lo general presentaban memoriales a las autoridades u obtenían padrinos que les gestionaban comprador.<sup>4367</sup> El mulato Domingo, de 25 años, quien servía en 1745 en el Convento de Predicadores de Asunción, "...se vino a ésta huído pidiendo venta".<sup>4368</sup> El negro Antonio, capataz de la quinta de Felipe Castilla, vecino de Buenos Aires, se había fugado en 1796, lo cual

"...le parece puede hacerlo impunemente porque en el tiempo de su fuga presenta Memorial al Superior, y en este tiempo me priva de su servicio, de que no solo se origina, por el abandono de la quinta, que esta no me fructifique como debe, sino además me entretiene en evacuar informes que causan sus Memoriales, sin poder atender a los demás esclavos que están en la Quinta de que resulta que estos abandonados a la olgazanería han dejado perder los plantíos".<sup>4369</sup>

Y el caso del negro medio bozal José María, de nación banguela, esclavo de Mariano Rodríguez, quien lo había adquirido en 1799 de José Antonio Techeyra en \$275, es sin duda el más interesante, por cuanto cuatro años después, en 1803, se quejó al Juez Juan Baso y Berry como su amo lo tuvo primero "...totalmente desnudo sin quererlo vestir sin embargo de darle mensualmente \$9 de jornal", para más luego pedir por su venta \$400, \$125 más que lo que marcaba su tasación, y exigirle 4 1/2 reales diarios de jornal "...aunque fuese los días de lluvia, dándole azotes si le faltaba con dicho jornal".<sup>4370</sup>

La fiabilidad de los mecanismos de seguridad existentes para afianzar la fuga variaban en gran medida con los métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización elegidos. Alegar un status falso, como el de ser liberto o manumiso, era una estratagema de lo más común. Por lo general, hasta que la veracidad de la excusa era comprobada el sospechoso era mantenido en prisión. Este fue el caso del negro Miguel, oficial herrero, de 22 años de edad, quien en 1748 huyó a Corrientes "...con el so color de libre".<sup>4371</sup> La angustia del mulato José González Pardo, residente en Mendoza, quien fue encarcelado en Buenos Aires en 1755 duró "...el tiempo en que se verificaba si era esclavo o no".<sup>4372</sup> La impostura o cambio de nombre, practicada por los esclavos fugitivos ansiosos por ocultarse de sus perseguidores, era una forma más usual de asegurar el éxito de la fuga. Por lo general, para cambiar de nombre se asumía un apellido hispánico, como era del uso entre los libertos.<sup>4373</sup> A pesar del hecho de que los fugitivos se escondían bajo nombres supuestos, algunos eran identificados por sus perseguidores, y encarcelados. El mulato Bentura, que "...por sobrenombre se a puesto Bentura de Aguilar", fue solicitado en 1719 por Inés de Salazar,<sup>4374</sup> viuda del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio.<sup>4375</sup> El mulato esclavo Julián, fue vendido por Manuel García Fernández en 1720 al Alférez Bernardo de Sevos con el aviso "...que siendo un huidor se ha puesto a sí mismo el nombre de José".<sup>4376</sup> El mulato Juan, de 40 años de edad, fugado en 1706, "...de color zambo y una quemadura en una sien y en un cuadril una mancha...tengo noticia se a mudado el nombre, poniéndose

el de Francisco Quintana hace 23 años".<sup>4377</sup> Menos de cien años después la impostura como método se perpetuaba, pues en 1798 el Comandante General de Armas Pascual Ibáñez de Echavarry le escribe al Virrey Antonio de Olaguer Feliú informándole haber dispuesto se entregue a Pedro González Cortina, apoderado de Petrona Caballero, vecina de Asunción, el pardo esclavo de ésta, "...que sentó plaza en el cuerpo de Blandengues de esa Frontera bajo el nombre de José Mariano Oviedo".<sup>4378</sup> En 1813 el negro Juan mantenía con Matías Magallanes, hacendado del pago de los Arrecifes, residente de Baradero, diversas instancias en el juzgado de 2o. voto "...ante quien a dicho llamarse Manuel".<sup>4379</sup> Y en 1819 Julián González otorgó un poder especial para recobrar la parda Josefa Medarda "...quien se huyó hace dos meses a Montevideo donde sabe se halla bajo el supuesto nombre de Dolores".<sup>4380</sup>

#### **K-IX El rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.**

La fiabilidad de estos mecanismos también variaba con el lugar elegido para la fuga. La seguridad que ofrecían para la fuga ciertos lugares provenía de su aislamiento geográfico o de la anonimidad que la alta densidad demográfica aseguraba. Las sierras de Córdoba, procuraban con su aislamiento geográfico, una seguridad solo comparable con las tolderías indígenas de la Pampa. Según la Tabla R-I, del 67% del total de poderes registrados para recobrar esclavos fugados que revelan el destino geográfico a donde los esclavos fugados de Buenos Aires entre 1708 y 1819 presumiblemente podían huir, Córdoba llevaba la delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados). También el desierto era elegido por los esclavos fugitivos. En 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández libraron un poder especial a favor de Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros

"...que a pocos días de haberlos comprado se nos huyeron y se hayan entre los indios serranos del cargo del Cacique Rafael Yatí para cuio percibo tenemos decreto auxiliorio de SSa. el Sr. Teniente de Rey y Gobernador Interino de esta Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de los pagos de la Magdalena y Matanza".<sup>4381</sup>

La anonimidad que Buenos Aires ofrecía a los esclavos fugitivos, provenientes del interior del espacio colonial, semejante a la que ofrecía Cartagena a los fugitivos de Nueva Granada,<sup>4382</sup> era procurada por su rauda crecimiento demográfico, y la abundancia de jornaleros sin empleo fijo. El refugio que los esclavos fugados no encontraban en otros lugares, sí lo encontraban en Buenos Aires, convirtiéndola así en un inmenso palenque urbano.<sup>4383</sup> En una carta escrita en Buenos Aires por el comerciante Francisco Antonio de Letamendi a Ambrosio Funes el 26 de Febrero de 1800 expresaba refiriéndose a su esclavo Nolasco, fugado de Córdoba:

"...aquí es casualidad encontrarlo por tener el refugio de ser dilatada la población, y en todo caso pasar a la otra vanda, o Montevideo".<sup>4384</sup>

Los destinos hacia donde se libraban los poderes eran por lo general los lugares donde se sospechaba que el esclavo se hubiere dirigido en su fuga. Más aún, el acto de otorgar poderes especiales para cobrar, recobrar o recaudar esclavos fugados era practicado sólo cuando el lugar de ocultamiento era identificado. Este dato no era siempre logrado porque había cientos de formas de ocultarse o pasar inadvertido. Según la Tabla R-I el destino geográfico a donde los esclavos fugados de Buenos Aires entre 1708 y 1819

presumiblemente podían huir fue declarado notarialmente en el 67% del total de poderes registrados para recobrar esclavos fugados (257 casos). En el 33% restante (126 casos) el destino iba a ser dado a conocer en un futuro inmediato. De los destinos conocidos Córdoba llevaba, como acabamos de afirmar, la delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados); seguido por Chile y Mendoza, con el 9% de los casos (24 cada uno); las provincias de Arriba (Alto Perú) con 23; Montevideo con 19; Paraguay con 18; Santa Fé con 16; Potosí con 15; Santiago del Estero con 14; Tucumán con 11; San Juan con 9; Corrientes y Jujuy con 6 cada uno, Lima con 3; Oruro, Santo Domingo Soriano, La Rioja, y Salta con 2 cada uno; y Cádiz, Gualaguay, Gualaguachú, Nogoyá, Paraná, Concepción, Luján, Río Negro, Arroyo de la China y Río Grande con un fugitivo cada uno.<sup>4385</sup> En algunos casos, el destino del fugitivo era impredecible, porque podía dirigirse a diversos lugares. El mulato Lorenzo, fugado de Mendoza en 1752

"...puede tirar a las Corrientes, o el Paraguay,...y también a Santa Fé, porque el no ha de parar en un lugar, pues aora es sabido que en otra huída que hizo antes que yo lo comprase, hasta el Río Grande [Brasil] fue".<sup>4386</sup>

En la estrategia represiva de los amos el lugar geográfico de donde procedían los esclavos fugados cumplía un rol clave. Si los esclavos provenían del interior del espacio colonial es probable que trajeran consigo no sólo el conocimiento de las lenguas y dialectos locales sino también el grado de conciencia prevaleciente en el lugar de expulsión. En la venta practicada en 1804 por José Ramírez, de la negra María del Rosario, le prevenía a la compradora Doña Micaela Usín, a los efectos de evitar su fuga, impidiera el trato con sus paisanas porque en Buenos Aires "...hay mas de 20 desterradas de esta ciudad [Corrientes] por sus delitos".<sup>4387</sup> Si bien la negra María del Rosario nunca había fugado, Ramírez le advertía a Doña Micaela que "...es inclinada a la libertad de conciencia y adaptará en esto quanto le influyan".<sup>4388</sup> Las lenguas y dialectos locales que hablaban los negros y mulatos esclavos provenientes del interior del espacio colonial eran herramientas sociales con las cuales planeaban el ocultamiento y la fuga. En la venta de la negra María del Rosario, procedente de Corrientes, el vendedor Ramírez le advertía a la compradora Usín "...le prive Vm. de toda comunicación y trato con mis paysanas y paisanos porque como saben otro idioma no intente la negra juirse".<sup>4389</sup> También era usual que los esclavos enviados con papel de venta trajeran consigo una caja con ropa. En la caja que traía la negra María del Rosario, su vendedor Ramírez, le instruía a la compradora Micaela Usín, no le permitiera a la esclava "...use de la ropa hasta venderla a otro".<sup>4390</sup>

#### **K-X El recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la fuga.**

Pocos son los trabajos sobre cárceles en el período colonial, conociéndose hasta el momento para el Río de la Plata sólo los trabajos de Mallo (1986,1992). Cuando los esclavos fugados eran descubiertos, automáticamente quedaban arrestados por los alcaldes y puestos en prisión, hasta que sus amos vinieran a rescatarlos, luego de pagar las correspondientes fianzas y derechos de carcelaje. El que un negro solicitara conchavo en un distrito donde no se lo conocía despertaba la sospecha ante las autoridades del lugar de que se trataba de un esclavo, prófugo de la casa de sus amos. En 1828, el Comisario de Quilmes remitió preso "...a un negro que apareció en la Sección de su cargo solicitando conchavo, por sospecha de que sea esclavo y prófugo de la casa de sus amos".<sup>4391</sup> En todas las villas y ciudades donde había Cabildo también había cárcel real.<sup>4392</sup> En algunas

ocasiones, cuando el esclavo lo ameritaba era retenido en prisión en casa del propio amo para luego pasarlo a la cárcel real. Vicente José Cabero, vecino de Mendoza, recomendaba en 1752 a Isidro Ortega que una vez que capturase al anteriormente citado mulato Lorenzo

"...asegúrelo bien en la cárcel, y mándele arrimar de cuando en cuando algunas bueltas, y luego con algún abrigo me lo puede remitir con un par de grillos bien remachados aunque los compre o los mande hacer y también esposas, para que duerma de noche".<sup>4393</sup>

La mulata María, de 37 años, por haber huido en dos ocasiones, su ama, Catalina Quintana, por sólo prevención la tenía en 1787 "...con grillos".<sup>4394</sup> Antonio García López, apoderado de la esclava Ana Paula, de 22 años, declaraba en la causa contra el amo Antonio Miró,

"...quien le ha dicho a este que le es facultativo hacer que mi parte coma el pan de la tribulación y veba el cáliz de la agonía, en la reclusión y encono de una casa destinada para las públicas e incorregibles prostitutas".<sup>4395</sup>

Con cuán superior razón, enfatizaba García López

"...debemos considerar prohibido el hacer a una mujer pasar la nota y la infamia de entrar en la galera o cárcel de las prostitutas, aún sin aquella previa información de serlo".<sup>4396</sup>

En muchos casos los esclavos presos en las cárceles reales también se fugaban.<sup>4397</sup> En otros casos, eran rescatados por cuenta y riesgo del vendedor o del comprador, lo cual incluía los derechos de carcelaje. Estos derechos eran discutidos por los eventuales vendedores o compradores. José Ariza le manifestaba desde Córdoba en 1803 a su hijo Agustín que los \$40 que le facturaban por el rescate del mulato José Patricio, natural de Corrientes,

"...será por carcelaje del negro aunque no te esplicas y en tal caso debes ver al juez de la causa que sentencie lo justo y solo esto deues pagar tomando recibo del Alcayde carcelero y que dicho Juez certifique al pié de dicho recibo ser cierto pues con él te se a de satisfacer su costo".<sup>4398</sup>

Como el Juez alegaba que el mulato había hecho fuga con anterioridad, aumentando los costos de carcelaje y desacreditándose a sí mismo, Ariza advertía que dicha noticia necesitaba confirmación, pues si tales fugas había hecho debía constar "...en donde le cojieron, que sujeto le cojió, en que paraje, como se llama el sujeto, o sujetos que lo aseguraron".<sup>4399</sup> De no poder venderlo con la merma de 20 o 25 pesos menos

"...asegúralo con varra de hierro y traélo [a Córdoba] sin consentirle cuchillo ni navaja no se deguelle y dándole una vuelta de azotes antes de ponerte a camino, cojiendo un buen peón para el camino, sin descuidarse con él atándolo de noche".<sup>4400</sup>

## **K-XI La consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su rápida individualización.**

Aquellos esclavos que contaban con señas o características físicas muy notorias les era dificultosa la fuga. Estas señas, que en el siglo XVII consistían en marcas a fuego, denominadas carimbas, jugaban un rol semejante al actual identikit, eran detalladas en carteles, fijados en las postas; voceadas por los pregoneros; incorporadas en las cartas de venta, manumisión y trueque; y denunciados por los amos a los alcaldes. Los Alcaldes notificaban a los Maestros de Posta y estos con tiempo, informaban a los dueños y capataces de carretas, gratificaciones de por medio, formando así una cadena de delaciones. Suprimida en el siglo XVIII la carimba, entre las características más comunes delatadas en los poderes para cobrar esclavos fugados figuraban la casta, el sexo, los rasgos o facciones de la cara, el tipo de pelo y de voz, el grosor de labios y narices, la altura y el talle, las cicatrices y mutilaciones de dedos y pies, y las enfermedades; y entre las no tan comunes el conocimiento de dialectos indígenas, las habilidades musicales, el modo de caminar, los vicios (alcohol, tabaco), el vestuario y el hedor. El negro Mina Antonio fue detallado como "...muy marcial en el caminar".<sup>4401</sup> El negro portugués Polinario, quien se hallaba en la estancia de la viuda de Fretes, en la Punta del Zauce, Córdoba, tenía por señas "...ser alto, delgado de cuerpo, la voz afeminada, color amulatado".<sup>4402</sup> El negro Joaquín, que se fugó a Mendoza, tenía por virtudes ser

"...de buen altor, flaco, picado de biruelas, habla ajitanada, con varias cicatrices en las piernas, con los dos dedos de la mano izquierda y del medio encogidos y tocador de biolín".<sup>4403</sup>

El mulato Felipe, de 20 años, natural de Córdoba, era de "...estatura baja, aindiado, algo ronco en la abla, picado de viruelas".<sup>4404</sup> El mulato Antonio Nieto, fugitivo en San Juan, era "...quebrado de una pierna y de habla gangosa".<sup>4405</sup> La negra Rosa, de 25 años, tenía "...el natural algo fuerte".<sup>4406</sup> La mulata Josefa, de 18 a 20 años, que se fugó de Córdoba con un mulato llamado Modesto, santafecino "...más negro que blanco, de mucho pelo, del cual es patrón un panadero que vive frente a San Francisco", era de "...regular altor, buena cara, de color bayo, pelo aindiado, risueña al tratarla y taciturna al verla".<sup>4407</sup> El mulato Lorenzo, fugado de Mendoza en 1752

"...es mulato zambo aindiado tiene una señal en la frente de herida, el poncho es abalandranado, firelesco, bien vestido, con camisa, y calzado anda siempre...el abío que tiene de montar a caballo es bueno, y me dicen que en las cabezadas del freno tiene chapas de plata".<sup>4408</sup>

Y en cuanto a la mulata Josefa, esta padecía en 1800 "...la enfermedad de detenérsele la menstruación originándosele de esto varios incidentes que la tenían algún tiempo imposibilitada".<sup>4409</sup>

La tartamudez, secuela indudable de algún trauma causado en la niñez por los castigos a que eran sometidos los esclavos por sus amos, era una señal muy usual entre los esclavos fugados.<sup>4410</sup> El mulato Diego, fugitivo en Santiago del Estero, "...habla muy pronto y tartamudo, de color renegrado".<sup>4411</sup> Y el mulato Isidro, próximo en su fuga al Río Grande, en la Banda Oriental, era de "...color aindiado, petiso y gordetón, que tiene un brazo quebrado pero ya sano, medio tartamudo para ablar".<sup>4412</sup> Algunos esclavos fugados tenían por señas ser de indudable extracción rural. El mulato José de 24 años, que se había huido a Santa Fé, era "...regordete, renegrado, medio secioso en el hablar, y el dedo del pie izquierdo algo torcido del estribo por ser peón de campo y domador".<sup>4413</sup> El negro Hilario, fugitivo por el Paraguay, era "...bajo y delgado de cuerpo, ñato por tener la nariz quebrada y de ejercicio domador".<sup>4414</sup> El negro criollo Mariano, huido al Tucumán, era

"...ñato, algo jetón, y tiene una señal en la cara de resulta de una cos que le dió un caballo, otra en un brazo de una cortadura y un pié en el empeine más abultado que el otro, siendo el dicho negro zurdo".<sup>4415</sup>

La inteligencia natural o cultivada era también una característica muy apreciada en las descripciones de los esclavos fugitivos. El mulato Francisco, de 14 años, que vino en febrero de 1772 fugado de Villa Rica, Paraguay, donde probablemente habría servido de sacristán, era "...espigado e indeble, de cuerpo ladino, sabe leer y firmar".<sup>4416</sup> El mulato Martín, natural del Río de Janeyro, y que le fue hurtado por alguien en viaje para las provincias de Arriba, era "...delgado de cuerpo, con un empeine en una mejilla, muy vivo de genio y danzarín".<sup>4417</sup> Y el mulato Antonio, maestro albañil, fugitivo en Corrientes, lugar donde había nacido, era "...color de tape, pelo lacio y corto, de buena estatura, bien echo, algo romo, y colorado, de mucha viveza para servir".<sup>4418</sup>

En conclusión, de la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos; de la reincidencia del esclavo en la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; de la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; de las crónicas y cíclicas crisis comerciales que fomentaban la fuga esclava; del grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; del rol clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; de la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; del uso del aparato represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y de la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, surge a las claras lo infundado del mito acerca de la docilidad del esclavo Rioplatense. La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas, económicas, políticas y sociales.

## Capítulo II-E-13 **Cimarronaje, bandolerismo y mito de la docilidad esclava.**

### Índice

- L-I Tradición historiográfica en materia de resistencia rural y campesina
- L-II Coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos.
- L-III Las guerras y la desertión de la tropa reclutada mediante levás.
- L-IV Parentesco, compadrazgo, amistad y comunidad de origen geográfico entre bandoleros.
- L-V Rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos.
- L-VI. Bandolerismo profesional.

### **L-I Tradición historiográfica en materia de resistencia rural y campesina**

Dado que en las postrimerías del período colonial la mayor parte de los esclavos criollos veía que algunas conquistas sociales (manumisión) o ciertos status (como el de hombre libre), eran imposibles de alcanzar sin haber logrado, entre otras cosas, acumular un peculio equivalente al valor de su tasación en el mercado de mano de obra, concluimos que el atributo de la libertad en la América colonial Borbónica, había devenido para una

gran parte de los esclavos, incapaces de acumular dichos peculios, en un status adscrito y no adquirido. De ahí que cuando los negros y mulatos criollos en ascenso padecían de un status adscrito tan subalterno como el de la esclavitud --que era escasamente modificable a través de la acumulación de un peculio individual-- la inconsistencia de status resultante no podía resolverse sino mediante la fuga individual o un cambio político revolucionario.

Estas inconsistencias de status estaban determinadas por el tipo de coaliciones o alianzas que se habían gestado entre los esclavos negros y mulatos prófugos y los criollos o españoles que operaban como padrinos en las fugas, en perjuicio de los amos. Mientras el fracaso de las fugas individuales de esclavos se debieron a la ruptura de frágiles coaliciones o alianzas, el éxito de ciertos fenómenos históricos, como la Reconquista y Defensa de Buenos Aires y las Guerras de Independencia, habría residido en la solidez de las alianzas inter-étnicas concertadas entre milicianos criollos por un lado y negros y mulatos libres por el otro.<sup>4419</sup> Es nuestra hipótesis entonces, que similar a lo sustentado por Lazo García y Tord Nicolini (1977,1978) y Flores Galindo (1984) para el caso de Lima; Domínguez (1985) para el caso de México; y Craton (1980) y Geggus (1985) para el del Caribe --y a diferencia de lo sostenido por Azara (1809,1943), Vidal (1820), Parish (1852), Gálvez o Quesada (1883) e Ingenieros (1937) para el Río de la Plata y por Patterson (1981) para América en general-- en el caso del Río de la Plata, las condiciones individuales y colectivas experimentadas a lo largo del siglo XVIII por los negros y mulatos esclavos debieron haber contribuido a agudizar las contradicciones, a acelerar el mestizaje que dio lugar al nacimiento de la conciencia criolla y a activar, primero la transición del cimarronaje (fuga esclava) al bandolerismo, y en segundo lugar la transición del cimarronaje a la Montonera, y finalmente a precipitar el clima revolucionario.

Por último, en la historiografía de la resistencia campesina, se hizo hincapié en los mecanismos colectivos de resistencia. En ella hubo una tendencia, como la liderada por Hobsbawm (1972), seguida por Joseph (1982) y Knight (1986), que puso énfasis en los estrechos lazos que habrían ligado a los bandoleros con los campesinos y las capas marginadas. Por el contrario, una tendencia revisionista reciente iniciada por Blok (1972) y continuada por Piel (1973), Lewin (1979), Vanderwood (1982), Slatta (1987), Chandler (1988), Langer (1989), Schwartz (1989) y Pérez (1989), desestimó dichos lazos e hizo hincapié en los vínculos que ligaron a los bandoleros con las elites. Una tercera tendencia, integrada por Singelmann (1975), Orlove (1980), Taylor (1988) y Flores Galindo (1984), sostiene que el bandolerismo representa una adaptación al régimen de explotación vigente más que una resistencia al mismo.<sup>4420</sup> Finalmente, una cuarta y última tendencia, influida probablemente por la lectura de trabajos sobre subculturas criminales y nuevos conceptos acerca del crimen,<sup>4421</sup> representada por Scott (1985), Heuman (1985), Adas (1986), Tilly (1989), Stern (1990) y Güemez Pineda (1991), rompe con la dicotomía entablada entre la tendencia del bandolerismo social (Hobsbawm, et. al.) y la corriente del bandolerismo profesional (Slatta, et. al.), y pone énfasis en los mecanismos individuales de resistencia de los campesinos, tales como la protesta cotidiana, o las formas rutinarias y espontáneas de resistencia, constituídas por herramientas como la fuga, la desertión, el cuatrismo, el juego, el contrabando y el sabotaje. Últimamente, Mallo (1992) agregó a este inventario las injurias, calumnias y difamaciones, y Barrenechea (1992) la sodomía y los ultrajes al pudor.<sup>4422</sup> En cuanto a la fuga esclava propiamente dicha, Piel (1973), seguido por Flores Galindo (1984), Aguirre y Walker (1990) y Andrés-Gallego (2005), fue el primero en descubrir como el cimarronaje en el Perú derivó en bandolerismo rural. El bandolerismo habría contado, según Flores Galindo, con una tendencia hacia la integración racial ausente en los palenques de negros esclavos prófugos.<sup>4423</sup>

Respecto de la fuga esclava y el bandolerismo rural, hasta el momento se conocen numerosos trabajos,<sup>4424</sup> También las autobiografías, la leyenda y el ensayo recogieron hechos y personajes históricos representativos del bandolerismo social.<sup>4425</sup> Learte (1926) relata como en tiempos de la Expulsión de los Jesuitas (1767) unos bandoleros lo asaltaron en el Tucumán.<sup>4426</sup> Canal Feijóo (1944) y Salinas (1986) escogieron la imagen mitológica del bandolero en la sabiduría popular argentina y chilena respectivamente, y Astrada (1948) la del gaucho fundado en Lugones y en Hernández. Canal Feijóo escogió el caso paradigmático del Santiagueño Silverio Leguizamón, quien habría alentado en las pulperías recurrir a la frontera indígena para alzar a la indiada contra el colonialismo español. Fue tomado preso en 1794, acusado de la muerte del hacendado Santiago César,<sup>4427</sup> y de Carlos Vivar.<sup>4428</sup> Conjuntamente con el reo Manuel Antonio Garay, Leguizamón fué enviado con cadenas al Tucumán, para luego ser devuelto a la cárcel de Córdoba, donde en 1802, y pese a la defensa que Antonio Fragueiro hizo del mismo, se le prodigaron 200 azotes, de cuyas resultas falleció.<sup>4429</sup> Y Herrera (1944) escogió el caso de un zambo prófugo, recordado como el indio Bamba, quien como luego veremos con más detalle, había raptado a mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única del matrimonio del Alcalde y fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia Arze, con la cual tuvo varios hijos mestizos, que Don Santiago se negó a reconocer como nietos suyos, drama del cual sobrevino luego la locura de su hija, conocida como "la Monjita", por haber residido los últimos días de su vida en un Convento.

Es nuestra hipótesis entonces, que a semejanza de lo sustentado por Scott (1985) para el caso de los campesinos, y a diferencia de lo sostenido por Patterson como ley general para cualquier lugar o región, la fuga de esclavos en el Río de la Plata fue por el contrario muy factible y bastante generalizada. Asimismo, para explicar el alzamiento de los gauchos, y su transformación en bandoleros, Alvarez (1914) sostuvo como causal los cambios introducidos en el sistema ganadero al compás de la valorización de las haciendas; Real (1957), la desmovilización de los ejércitos revolucionarios y la crisis de la producción doméstico-artesanal;<sup>4430</sup> y Halperín Donghi (1979), a diferencia de Real, la leva o presión enroladora de los ejércitos revolucionarios.<sup>4431</sup> Sin embargo, ningún autor intentó explicar dicho fenómeno a la luz de una preexistente sub-cultura cimarrona y bandolera, incluyendo su correspondiente cuota de memoria histórica. En ese sentido, nos proponemos en este capítulo, continuación de otro anterior, encarar la realidad de la región conocida como el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, así como la transición del cimarronaje al bandolerismo, y de este último a la Montonera.

## **L-II Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos.**

Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio de los amos se manifestaron en diversos lugares, tales como Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires; y en diversas instituciones tales como cuarteles de regimientos, chacras y estancias, y rancherías de Conventos. Para asegurar su fuga, los esclavos recurrían al alistamiento como soldados en los ejércitos reales y patriotas, o como sacristanes en las capillas e iglesias.<sup>4432</sup> El mulato prófugo Benito, héroe de la Defensa de

Buenos Aires, fue manumitido en 1808 en \$250, de manos de Francisca Otermín, viuda de Andrés Benito Fajardo, vecino de Maldonado, por el Cuerpo de Pardos y Morenos, el cual "...había depositado esta suma con anterioridad [a la fuga] en Estéban Villanueva".<sup>4433</sup> En 1813 Pedro Miguel Anzuátegui otorgó un poder a Custodio de Toledo para recoger varios esclavos "...que en el día se hallan en el Ejército de la Banda Oriental".<sup>4434</sup> Y en 1821, Pedro Giles reclamaba un esclavo suyo que estaba sirviendo en el Batallón de Cazadores bajo el nombre de Miguel Casaballe.<sup>4435</sup>

En las estancias y localidades rurales también ocurrían fugas de todo tipo. Si bien la circulación de esclavos fuera de las unidades de producción no era algo excepcional,<sup>4436</sup> a los efectos de impedir la fuga de los mismos, los amos no debían permitir que sus hijos o parientes trataran a los esclavos ajenos con "...amistad, compañía o buen recibimiento".<sup>4437</sup> Esta actitud podía ser sospechada de fomentar la fuga. En el caso del mulato fugitivo Juan Manuel, esclavo del estancquero de Areco, Don Agustín de la Iglesia,<sup>4438</sup> éste le reprochó a Don Juan González,<sup>4439</sup> y sus hijos, que la fuga de su esclavo obedeció a la amistad, ocultación, agasajos y "...buen recibimiento en su Casa y compañía todos los días".<sup>4440</sup> Esta era la relación que

"...tenía el mulato en la Casa y con los hijos de González, y esto es lo mismo que este no debió haber permitido, por que sabía muy bien que Juan Manuel era esclavo y que todo el tiempo que permaneciese en su casa o en compañía de sus hijos faltaba al preciso servicio de su amo, y como esto era cuasi diario resultó que el mulato se disgustase del trabajo y de servir a su amo, y de aquí provino la fuga que hizo".<sup>4441</sup>

Entre las rancherías donde se refugiaban esclavos fugitivos, y donde probablemente tuvieron su origen gran parte de los bandoleros, se destacaron en Córdoba las de las estancias de Temporalidades, la del Convento de la Merced, y las de los Pueblos de Indios; y en Mendoza la del Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín. Albores, Mayo y Sweeney (1987) relatan que Diego de las Casas, un testigo acusado de corrupción, reconocía que luego de la Expulsión de los Jesuitas los negros y peones libres que habían pertenecido a los Jesuitas de Córdoba gozaban "...de más libertad que los nobles más acomodados".<sup>4442</sup> En Córdoba, un mulato esclavo, fugitivo, propiedad de una cuñada de Antonio Baigorri, vecino de Córdoba, se había ocultado en 1783 en la ranchería del Convento de la Merced, bajo la protección y padrinzago de los frailes.<sup>4443</sup> Cuando el Maestre de Campo Juan Bautista de Ysasi y Molina,<sup>4444</sup> envió al Teniente de Alguacil Mayor Don Manuel Villegas y al Ministro de Justicia Lorenzo Díaz para que prendiesen al esclavo,

"...salió una turba de mulatos algunos con cuchillo en mano, entre los cuales venía Fr. Nicolás Galván, con un garrote en la mano a impedir la prisión del citado mulato, como en efecto así sucedió; de manera que estando para retirarse los Ministros de Justicia y demás que le acompañaban salió por otro lado otra turba de mulatos con otro Religioso llamado Fr. Baltasar Palacios quien con bastante descompostura no digna de su carácter ultrajó demasadamente a referidos Ministros de Justicia, llegando hasta el extremo de darle al Teniente de Alguacil Mayor dos empujones a echarlo fuera de la Ranchería profiriendo que en ella no debía entrar Justicia ninguna y que saliesen cuanto antes fuera".<sup>4445</sup>

Los Pueblos de Indios también solían ocultar esclavos prófugos. El propio Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte, a juicio de Ambrosio Funes, no se detuvo

en escrúpulos de legitimidad racial para conformar dichos Pueblos, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos, y aún los negros mismos".<sup>4446</sup> En 1753, el Alcalde de la Santa Hermandad Cristóbal Barbosa de Araujo,<sup>4447</sup> fue enfrentado por la población del pueblo de Nono, distrito de Traslasierra, cuando quiso detener a una mulata fugada llamada María.<sup>4448</sup> Más luego, también los Indios del Pueblo de Salsacate, al norte de Nono, participaron de un alzamiento, aunque se desconocen sus verdaderos motivos.<sup>4449</sup>

Pero el lugar donde más claro se manifestó una coalición entre padrinos criollos y esclavos, en perjuicio de los amos, fué en Mendoza, y en especial en la finca del Carrascal,<sup>4450</sup> del Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín;<sup>4451</sup> el más grande productor colonial de vino y aguardiente, así como de barriles y tinajas de barro para transportar la producción vitivinícola.<sup>4452</sup> El inusitado record de fugas que manifestó este Convento se atribuyó a la primitiva coalición entre esclavos y criollos celebrada en Mendoza en 1781. Masini Calderón (1979) revela que por intermedio del Alcalde Raymundo Pelliza Morales,<sup>4453</sup> dicho Convento ensayó para 1781, una coalición entre esclavos y criollos, que se manifestó en un permiso para que los esclavos trabajaran una semana para el Convento y otra semana para sí mismos en las fincas de particulares.<sup>4454</sup> No obstante este permiso, aludido por Masini Calderón, hemos comprobado como en dicho Convento convivían mulatos esclavos con numerosos mulatos libres, descendientes casi todos de un albañil llamado Antonio y de una negra o mulata llamada Lucrecia, esclavos manumitidos en 1647 --año del terremoto que destruyó gran parte de Santiago de Chile-- por los mismos que habían donado la Hacienda del Carrascal a los Agustinos: Juan Amaro de Ocampo,<sup>4455</sup> y su mujer Mayor Carrillo de Bohórquez.<sup>4456</sup> Esta manumisión había sido concertada con la condición de que la pareja de esclavos sirviera a los frailes en la construcción de su Iglesia.<sup>4457</sup> Pero esta coalición étnica se vió políticamente perjudicada por una profunda caída de la productividad de la finca --muy probablemente provocada por el ausentismo, el sabotaje y una desmedida multiplicación de los mulatos de status libre--<sup>4458</sup> y un desorden generalizado donde según manifestaban las autoridades de la Orden Agustina abundaban casos de prostitución, robo y homicidio. Al escaparse los esclavos del control de la autoridades del Convento y provocarse en los vecinos criollos de Mendoza el "miedo a las masas", o su retraimiento, el Corregidor interino Andrés Antonio Moyano,<sup>4459</sup> miembro de una de las tres casas reinantes,<sup>4460</sup> designado por la Real Audiencia de Chile, reconoció la necesidad de apoyar y fortalecer las autoridades de la Orden.<sup>4461</sup> Estas autoridades estaban interesadas a su vez en preservar a los pobladores de sus rancherías con el status de esclavos y no con el de libertos, para así poder enviar los excedentes de mano de obra al convento matriz de La Estrella, en Santiago de Chile, y eventualmente a los yacimientos mineros de La Serena.<sup>4462</sup> Con motivo de este cambio de política, que privaba a los criollos dueños de fincas de mano de obra conchabable, se originó en Mendoza en 1782 una conspiración integrada por una facción capitular,<sup>4463</sup> adversaria de las llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron desterrados el suegro del Alcalde Pelliza, Francisco Videla y Aguiar,<sup>4464</sup> conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta.<sup>4465</sup>

Como secuela de esta derrota política, para 1785 más de cien esclavos habían desertado del Convento de Santa Mónica, quienes con el apoyo del Cabildo de Mendoza se habían opuesto a ser trasladados al Convento de La Estrella.<sup>4466</sup> Los esclavos alegaban verdadera o falsamente, incluso mediante la confección de genealogías, ser hombres libres, descendientes de antiguos manumisos que sirvieron en la Orden y vivieron en su propia ranchería. El caso más sonado fue el del mulato José Guzmán, y 28 mulatas mas, mencionadas por sus nombres, pertenecientes a siete líneas sucesorias de una misma

cabeza genealógica, ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se pretendía aclarar. El Prior de la Orden, Fernando Moratón y Gómez de la Madrid, reclamó judicialmente la recuperación de Guzmán en 1791, al extremo de litigar en los estrados de la Real Audiencia de Buenos Aires. El primer abogado de Guzmán, el poeta Domingo de Azcuénaga, justificaba no haber pedido en primera instancia las partidas de bautismo de Guzmán y demás mulatos "...porque los mismos Padres desde tiempo inmemorial han estado en la Posesión de ser Vice-Curas de la Parroquia donde dichos Esclavos se bautizan".<sup>4467</sup> Y el último abogado de Guzmán, el Dr. Mariano Andrade,<sup>4468</sup> sostenía --a falta de partidas de bautismo y matrimonio-- con las declaraciones de cinco testigos libres,

"...que en la Ranchería de los Padres Agustinos de Mendoza se han conocido desde muchos años dos clases de sirvientes, unos libres como descendientes de Lucrecia, y los demás verdaderos esclavos del convento",<sup>4469</sup>

Con estos mismos testimonios, Andrade probaba que Guzmán y las 28 mulatas descendían por línea recta de un bisabuelo común, el albañil Antonio --quien había servido a mediados del siglo XVII en la Fábrica del Convento de Santa Mónica. En el caso de Guzmán, éste procedía de Antonio por ser hijo de Cecilia Guiñazú, ésta de Margarita Reyes, y ésta última de Lucrecia, la mujer de Antonio, "...conviniendo todos los cinco testigos que estas dos ascendientes del mulato Guzmán por voz y fama pública son descendientes de Lucrecia".<sup>4470</sup> Los referidos religiosos agustinos habían confesado, por intermedio de su abogado el Dr. Francisco Bruno de Rivarola, que

"...Lucrecia y Antonio, esclavos que fueron de Juan Amaro Ocampo y Mayor Carrillo, quedaron libres [por cláusula testamentaria fechada en 1647] con la condición el primero de servir en su oficio de albañil a la Fábrica del Convento y resultando de aquí bien clara la libertad de los descendientes".<sup>4471</sup>

Finalmente, y pese al fallo adverso, seis años más tarde, en 1797, el mulato José Guzmán fue manumitido por la misma Orden, mediante una escritura firmada por su apoderado en Buenos Aires José de la Oyuela.<sup>4472</sup> Del resto de su accidentada vida nada sabemos hasta el momento.

No obstante la repercusión que este prolongado pleito debe haber tenido en Mendoza, las fugas de los mulatos que no querían servir como esclavos arreciaron. En el transcurso de más de treinta años, desde 1753 a 1797, se habían fugado de este Convento más de un centenar de mulatos tenidos por esclavos, de los cuales más de una docena se vendieron o manumitieron en Buenos Aires por los apoderados de la Orden, Francisco X. Ferrera y José de la Oyuela.<sup>4473</sup> Con el transcurso del siglo las tensiones no cesaron por cuanto a los dos años de producida la revolución de independencia, en mayo de 1812, se registró en Mendoza un motín de esclavos, alentado por la libertad de vientres decretada en Chile. Mientras la mayoría de los fugados eran mulatos, la Tabla DD-I, al detallar la nómina de los 28 detenidos en el motín de 1812, revela que la mayoría eran negros y de todos ellos: cuatro, o el 14%, fueron mulatos, otros cuatro artesanos y la mayoría sin oficio alguno. En efecto, Antonio María, esclavo de Doña Juana María Martínez de Rosas, declaró en Mayo de 1812 que el mulato Bernardo, músico, esclavo de Francisco Aragón, le propuso

"...que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos y que esta la tenían usurpada [retenida] aquí los Sres. Jueces, de lo que él tenía constancia por unos papeles que tenía en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos

hacer que se les declarase, para lo cual convenía juntarse todos, abanzar el cuartel, y Sala de Armas, tomar éstas, y dar un avance a los Sarracenos, quitándoles el dinero, y género que tuviesen y prenderles, y luego presentarse a las Justicias para que les declarase la libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al Superior Gobierno".<sup>4474</sup>

Estando complicado en el motín el más luego General Manuel Corvalán,<sup>4475</sup> quien estaba al frente del Fuerte de San Carlos, hizo que el citado esclavo Bernardo, incriminado en dicho levantamiento, manifestara en julio de 1812, que el Coronel le mandó

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía porqué siendo Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que sin duda por esto habrán levantado el falso testimonio de que Don Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los esclavos".<sup>4476</sup>

También, en la campaña de Córdoba y San Luis las coaliciones entre esclavos y criollos llegó a desmoronarse, pues se registraron una suerte de palenques, donde convivían cuatreros y esclavos prófugos, perseguidos por los Jueces Pedáneos. Para Lockhart (1968) la notoria ausencia de lugares de refugio y la hostilidad de la frontera indígena en el Río de la Plata conspiraba contra una fuga generalizada de esclavos.<sup>4477</sup> Sin embargo, la naturaleza agreste de los valles serranos cordobeses, poblados de montes impenetrables, por lo general de algarrobales, en especial el curato de Traslasierra,<sup>4478</sup> y la alta proporción de población campesina existente en el mismo, prestó a dicho lugar la ocasión de protagonizar el experimento histórico de marras.<sup>4479</sup> Barrionuevo Imposti (1949) nos revela que entre 1784 y 1794 residieron en San Javier, curato de Traslasierra, 246 personas de raza española, 268 indígenas puros, y algunos mestizos, pardos y esclavos que no cuantifica.<sup>4480</sup> A fines de siglo, el apoderado de los dueños de tropas de carretas, procedentes de Mendoza en viaje a Buenos Aires José Antonio Villanueva, se quejaban de que entre los numerosos perjuicios que les ocasionaba detenerse en San Luis era "...la pérdida de animales en la espesura de los Bosques de que está circundada, en los cuales viven ocultos una multitud de ladrones, que se mantienen solo con el robo de las Boyadas, que se distraen de las tropas".<sup>4481</sup>

Ya en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo quedado las vaquerías que se practicaban en la jurisdicción de Córdoba, libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña, menudearon todo tipo de tropelías.<sup>4482</sup> En 1745, y con motivo del desorden desatado en la campaña, la "plebe" pastora, primera denominación con que se conoció la existencia de un bandolerismo rural incipiente, que luego dio en llamarse Montonera, dio muerte al Alcalde Ordinario Manuel de Murcia.<sup>4483</sup> Ocho años más tarde, en 1753, y habiéndose multiplicado las tropas de carretas, las arrias de mulas al Alto Perú y las corambres ilegales --que obedecían al boom comercial generado por el ingente número de navíos que arribaban a Buenos Aires, desde que se declaró la Paz de Aquisgrán (1748)-- el desorden de la campaña se acentuó.<sup>4484</sup> En dicho desarreglo y aprovechando un incidente menor, la misma "plebe" hirió de una puñalada al Alcalde Ordinario Francisco Javier Garay,<sup>4485</sup> un partidario del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León.<sup>4486</sup> De resultados de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde de primer voto a Juan Agustín de Echenique,<sup>4487</sup> por cuanto "...se necesita su persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad como su jurisdicción y demás reparos de la causa pública".<sup>4488</sup>

El ejemplo de este desorden cundió en la segunda mitad del siglo. Para 1774, Barriónuevo Imposti (1968) relata la existencia de la llamada Rebelión Comunera, diez años después de ocurrida la Rebelión Comunera de Corrientes. Dicha rebelión dejó a su vez su impronta, pues quince años más tarde, en 1790, el Gobernador-Intendente Sobremonte dicta un Plan para exterminar los ladrones de la campaña.<sup>4489</sup> Transcurridos cinco años, en 1795, en un ignorado documento elevado por el Gobernador Sobremonte al Virrey se registra que Fernando Calamucha y Francisco Fernández se habían rebelado contra los Jueces Pedáneos, acaudillando a numerosos bandoleros.<sup>4490</sup> Otros dos años después, en 1797, el Gobernador Sobremonte elevó al Virrey una Relación donde le informa como los salteadores "...fácilmente se abrigan en los bosques inmediatos y suelen hacer sus insultos".<sup>4491</sup> Y ya culminando el siglo, en 1799, el sobremontista Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,<sup>4492</sup> le escribe al Gobernador-Intendente informándole de la cantidad de malevos aún existentes en la campaña de Córdoba.<sup>4493</sup> Entre los seguidores de Calamucha figuraban los bandoleros Francisco Xavier Gómez y Pedro Juan Aguirre, y entre los de Fernández, el bandolero Juan Pedro Lemus.<sup>4494</sup> La transición del cimarronaje al bandolerismo.

Aquí es donde la temática del cimarronaje se entronca con la del bandolerismo. La lista de los reos aprehendidos por los Jueces Pedáneos, registrada en la Tabla RR-I, lamentablemente no revela la casta de cada uno. Pero sí revela que la mayor parte de los mismos, fueron aprehendidos en las sierras de Córdoba. De 67 presidiarios (sobre un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fué registrado, el 38% (26 casos) fue aprehendido en el partido de Traslasierra, entre ellos el de Siciliano Cuello, A. Quevedo, y José Manuel Eredia, compañero este "...en el alzamiento de los Indios del Pueblo de Salsacate"; 5 en el Valle de las Palmas; 5 en la Punilla; 4 en Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en Calamuchita. El resto de los presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a parar a las minas de Famatina.<sup>4495</sup> Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios de ellos caen enfermos, siendo necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.<sup>4496</sup>

También los montes del Tucumán y del Chaco,<sup>4497</sup> los esteros correntinos,<sup>4498</sup> y las cuchillas entrerrianas y Orientales,<sup>4499</sup> se prestaron pródigamente, a fines del siglo XVIII, para este experimento social.<sup>4500</sup> El Gobernador Intendente de Santa Cruz de la Sierra Francisco de Viedma informaba en 1800 al Virrey Marqués de Avilés que los indios rebeldes Chiriguano de la Cordillera de los Sauces,<sup>4501</sup>

"...no hacen la Guerra en campaña abierta, ni resisten en el puesto más fortificado con tesón y empeño, nuestros ataques luego que advierten bentaja en el combate, y caen algunos muertos disparan a los montes y alturas como los mas ligeros venados; su guerra es piratesca; se aprovechan del menor descuido para dañarnos: así lo consiguieron en las muertes de Don Manuel Terrazas, Buzeta, y demás".<sup>4502</sup>

Y en su estrategia para derrotar a los indios charrúas, escondidos en los impenetrables montes de la Banda Oriental pero demográficamente diezmados en el pasado por los indios Guaraníes,<sup>4503</sup> el Comandante de Frontera Jorge Pacheco,<sup>4504</sup> sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el triunfo".<sup>4505</sup> El método consistía en asaltar

"...los enemigos después de bien espíados, quienes buscarán su acostumbrado asilo, y entonces veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras tantas bajarán igual distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus

frentes dentro, y luego que se hallen así cortados atrás y adelante se practicará el registro por el todo de la Expedición, y habiendo destinado antes en uno y otro costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que giren de continuo en observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo método".<sup>4506</sup>

### **L-III Las guerras y la desertión de la tropa reclutada mediante levas.**

La desertión de la tropa reclutada mediante levas debe haber sido tan antigua como las guerras represivas que se libraron en esta parte del dominio español. Las campañas militares en la segunda mitad del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes; las expediciones porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII, contra la Rebelión de los Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y más luego por Fernando de Mómbox y Antonio Ruiz de Arellano (1735);<sup>4507</sup> o la expedición porteña del Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de las llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56), registraron una numerosa serie de desertiones. Es de advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano. Tan fue así, que el 20 de Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y libertos se alistaran en las fuerzas que se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de indios "tapes" rebeldes.<sup>4508</sup> En la Primera Expedición de Misiones desertaron 25 hombres.<sup>4509</sup> En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 1752, los tercios de La Rioja y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.<sup>4510</sup>

Con motivo de las levas practicadas en Corrientes, en oportunidad de la reconquista de la Colonia del Sacramento, cuando España entró con motivo del Tercer Pacto de Familia en las ulterioridades de la Guerra de los Siete Años (1756-63), la fuga a los montes y los esteros fue generalizada. En 1762, al final de la llamada Guerra de los Siete Años, de la expedición correntina del Comandante Bernardo López, movilizada por orden del Gobernador Pedro de Cevallos, primero para una Entrada al Chaco y luego para la recuperación de la Colonia del Sacramento, desertaron medio centenar de correntinos.<sup>4511</sup> Esta desertión generalizada es la que dos años después alimentó en Corrientes la llamada Rebelión Comunera. También, con motivo del operativo militar de Expulsión de los Jesuitas (1767), dirigido por el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Córdoba del Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa, se produjo una acentuada despoblación o diáspora de las Misiones, Colegios y Haciendas Jesuíticas.<sup>4512</sup> Asimismo, es de suponer que cuando en oportunidad de la Guerra de Independencia Americana (1776), España entró en guerra con Portugal, aliada de Inglaterra, y las tropas porteñas cruzaran el Río de la Plata, se repitiera el mismo fenómeno. Cinco años más tarde, en 1781, en oportunidad de la rebelión indígena de Túpac Katari, los 400 hombres que el Paraguay puso en marcha, al mando del Teniente Coronel Francisco González, jamás llegaron al Alto Perú, debido a una desertión generalizada,<sup>4513</sup> y los 300 hombres que Tucumán había destinado a igual destino, bajo el mando del Comandante Juan Silvestre de Heza y Helgueros,<sup>4514</sup> se sublevaron en Sica Sica contra su mismo Comandante.<sup>4515</sup> Y en oportunidad de las Invasiones Inglesas, debido a las levas practicadas en Paraguay, Salta y Córdoba, la fuga a los montes y la sierra fue también generalizada. En 1807, en Paraguay, de los 314 soldados que se alistaron, casi todos desertaron en el camino a Buenos Aires.<sup>4516</sup> En Salta, el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo, denunciaba que el Regimiento Miliciano "...luego que se tuvo la noticia infausta de la toma de Buenos Aires

por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se ocultaron los citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital".<sup>4517</sup> Y en Córdoba, en oportunidad de las Invasiones Inglesas, se vio como el Coronel Santiago Alexo de Allende,<sup>4518</sup> con motivo de las contribuciones forzosas a que se veían expuestos los estantes y habitantes entre los 20 y 50 años de edad, para ser exceptuados de la convocatoria, dio lugar también a una diáspora generalizada luego de "...la acrimonia, las exasperaciones, los insultos particulares, al hacer la asignación de los que [el Coronel Allende] alistaba para dicha empresa".<sup>4519</sup> Diez años después, en plena guerra de independencia, año de 1814, Pianetto (1968) nos revela que en Pocho, curato de Traslasierra, la fragosidad del lugar ayudaba a la gente prófuga.<sup>4520</sup> Medio siglo más tarde, este curato fué el escenario desde donde el famoso bandolero Santos Guayama y su redentor el Cura Brochero desplegaron las acciones que les dieron celebridad.<sup>4521</sup>

#### **L-IV El parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de origen geográfico entre bandoleros.**

Tanto Slatta (1991) como Joseph (1991), aunque duramente enfrentados entre sí en la polémica sobre la naturaleza del bandolerismo, están contestes que lo que unía a los bandoleros no era la clase sino el parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de origen geográfico.<sup>4522</sup> En algunos casos, reseñados en la Tabla RR-I, los victimarios solían ser parientes de otros bandoleros o guardaban cuentas contra miembros de su propio clan familiar. El reo Tomás Antonio Márquez vivía en el monte, desde donde se había de vengar de sus propios tíos, por haberles quitado sus tierras. El reo Francisco Otárola era sobrino del mismo Fernando Calamucha, "capitán de bandoleros", y el reo Paulino Pérez, (a) "Malcristiano", fue preso por haber querido rescatar de la cárcel a su padrino, el reo León Prado, "...acometiendo al Juez Pedáneo con un sable, con el que hirió a José Madera y José Campos, al uno arriba del brazo y al otro en la sangradera".<sup>4523</sup> Las parejas de reos de apellido Aguilera, Aguirre, Altamirano, Bustamante, Cuello, Eredia, Funes, Gómez, González, Portillo, Quevedo, Quintero, Ramírez, Romero, Villagra, Xaimés, y Zapata, probablemente fueran hermanos, primos, o tíos y sobrinos entre sí. La íntima relación de parentesco que se dio entre los rebelados en Traslasierra en 1774, los bandoleros de las rebeliones de Fernando Calamucha y Francisco Fernández contra los Jueces Pedáneos, acontecidas en 1794-95, y la Montonera de Facundo Quiroga, de la década de 1820, la da la lista de los presidiarios de 1796, registrada en la Tabla RR-I, y ciertos recuerdos registrados en las Memorias del General José María Paz. Dicha lista revela varios apellidos que repiten los mismos apellidos de los que se habían sublevado veinte años antes: los Cuello, Quevedo, y Heredia. Asimismo, el protagonismo en dichos episodios de una pareja de padre e hijo, Joaquín Güemes Campero, el Asesor de la rebelión de 1774 y Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, y su hijo Manuel Güemes Campero, oficial de Facundo Quiroga en la batalla de Oncativo.<sup>4524</sup>

Los obstáculos que inhibían a algunos bandoleros a la acción colectiva provenían, según Scott (1985), de los lazos de parentesco que los unían con miembros de la élite.<sup>4525</sup> Uno de los casos más paradigmáticos fue el que se suscitó en Córdoba con la banda de los llamados Guevaritas, pertenecientes a la familia de los Ladrón de Guevara, la cual poseía su cuartel general en los alrededores del Fuerte de San Carlos del Tío.<sup>4526</sup> El Juez Cuadrillero del Partido del Tío, Don Mariano Rodríguez, denunciaba en 1807 al Comandante General de Armas Coronel Santiago Alexo de Allende, que había sido depuesto de su cargo y despojado de sus armas por el Teniente de Milicias Urbanas Don

Lauro Álvarez,<sup>4527</sup> por el hecho de haber remitido entre otros presos a Mariano Guevara,<sup>4528</sup>

"...de los famosos Guebaritas del Tío, que son el azote de aquel Partido sin que haya habido quien los contenga. Son Primos o parientes muy inmediatos del Sr. Teniente Gobernador [Dr. Victorino Rodríguez, hijo de José Rodríguez y Felipa Catalina Ladrón de Guevara] quien los soltó en el acto, y su causa se rompió y se perdió, y aunque solicité me diese recibo de ella, no merecí ni aún contestación".<sup>4529</sup>

Cuatro años después de producida la Revolución de Mayo, Pianetto (1968) menciona como el Comandante Plá y Casanova y el Sargento Pedro Matías Cuestas, indefensos frente a la anarquía desatada en la campaña de Córdoba, designan al mando de una escuadra de 27 hombres al desertor José Antonio Guevara,<sup>4530</sup> y sus acompañantes, para quienes luego piden el indulto "...pues quieren darse a la Patria y servir".<sup>4531</sup>

La pertenencia de las víctimas de los bandoleros a la elite o al campesinado podrá ser revelada por el tipo de delitos incriminados. La mayor parte de los reos fueron presos por "no saberse conchabar" y por ser cuatreros, desertores de los presidios de la frontera, o prófugos de las cárceles de la región.<sup>4532</sup> En un solo caso se señala el nombre de la víctima, que se trata de Manuel Carranza, perteneciente a un conocido clan de terratenientes. Uno de los delitos más comunes atribuidos a los bandidos fue el robo de mujeres, por lo general casadas, pero sin especificar su estamento social y sin identificarlas por su nombre y apellido, salvo los casos del reo Leandro González, quien había raptado a Antonia Acosta, y del reo Bartolomé Gómez quien vivía con una cuñada suya.<sup>4533</sup>

## **L-V El rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos.**

En la formación de una conciencia nacional, el rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos y en las movilizaciones guerreras fue para algunos autores de una importancia determinante.<sup>4534</sup> Previo al rapto de las mujeres, que fueron violentamente extraídas de la Capilla del Puesto de Santa Ana, el letrado relator Dr. Agustín Pío de Elía expuso ante la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, que habiéndose acogido aquellas gentes en la Iglesia "...y abrazándose de una Imagen, clamaron misericordia, e inmediatamente la impetraron, y cesó el tiroteo de armas, concediéndoles perdón".<sup>4535</sup> También fue el caso, según Dussel (1970), de las Vírgenes del Valle en el Noroeste, de Itatí en el Litoral, y de Luján en Buenos Aires.<sup>4536</sup> Y solo en un sonado caso, la leyenda popular inmortalizó al victimario de un rapto. Esto ocurrió en la sierra de Córdoba, perteneciendo la víctima a la elite Cordobesa. En este lugar se desarrolló uno de los dramas sociales más trágicos y conmovedores registrados en los anales coloniales. En efecto, un zambo llamado Bamba había raptado a mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única del matrimonio del Alcalde y fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia Arze, con la cual tuvo varios hijos. Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena visitó a su padre con sus hijos mestizos no fue recibida por éste. Más luego, habiendo enviudado y perdido a sus hijos, enloqueció de dolor. Fue hallada en la sierra cordobesa luego de muchos años, y falleció en el Convento de las Catalinas. Su drama fue inmortalizado por Ataliva Herrera (1944) en su poema Bamba. En el folklore regional cordobés se la mitificó como un ave campesina apelada "la monjita".<sup>4537</sup>

También, aunque en menor grado, se han encontrado casos en que individuos prófugos de la justicia, libres o esclavos, entraron en relaciones de confabulación con peones o esclavos, pertenecientes a las haciendas de la región. El Comandante Félix Mestre se quejaba en 1783 al Virrey Vértiz que quince Santiagueños presos en la Hacienda de Santa Catalina se habían fugado.<sup>4538</sup> Valentín Díaz, de oficio sastre, esclavo de la Hacienda de Santa Catalina, fue castigado en 1808 por el Mayordomo Don Tomás Díaz, sobrino del finado propietario Don Francisco Antonio Díaz,

"...porque tubo oculto en la bodega a Juan Manuel libre y residente en el Río de Pinto, en cuya ocasión en que también estuvo presente se le darían de veinte y cinco a treinta azotes de que quedó algo lastimado: que estuvo en el sepo en esta misma ocasión y de un día para otro y de Pies, sin que ni en la una ni en la otra, ni en ninguna se le hubiese hechado cebo hirviendo en las llagas",<sup>4539</sup>

Si bien a Juan Manuel no se le había hechado cebo hirviendo en las llagas, dicho Don Tomás lo tuzó de una trenza que tenía por delante, "...lo mismo que executó con el declarante [Díaz] sin causa alguna cuyos hechos son afrentosos según entiende por que se les hace burla".<sup>4540</sup> Esta practica era tenida por afrentosa desde tiempo inmemorial, en especial entre los indios. José de Acosta, en su obra *De Procuranda Indorum Salute*, sostenía que trasquilar era tenido por la mayor afrenta entre los indios".<sup>4541</sup>

## **L-VI El bandolerismo profesional.**

En algunos casos, la vinculación entre el bandolerismo y la elite, o lo que sería mejor denominar un bandolerismo profesional, fue aparentemente más fuerte que la ligazón entre el bandolerismo y el campesinado, más conocido por bandolerismo social. En efecto, el Alcalde de Hermandad Fermín de las Casas y Funes y su hermano Diego de las Casas,<sup>4542</sup> junto con Ignacio Tejeda, habían protagonizado en la década del 50 uno de los casos de bandolerismo más crueles e impunes que se hayan cometido en los anales de la elite rural rioplatense.<sup>4543</sup> Luego que un malón de indios ranqueles asaltara en 1749 una tropa de carretas y asesinara al comerciante Nicolás Gil,<sup>4544</sup> que viajaba desde Mendoza hacia Buenos Aires, con caudales de oro y plata; Casas y Tejeda, ocasionalmente en el paraje de las Tunas, al toparse con las carretas abandonadas robaron los caudales y ahorcaron a un mulato sobreviviente, para que no quedaran testigos del saqueo.<sup>4545</sup> Con ello Casas no culminó su circuito criminal. Pues más adelante fue acusado de ultimar a varios de sus paisanos, entre ellos a Francisco Ballesteros.<sup>4546</sup> La violencia vigente en la frontera de la pampa, lindante con las provincias de Córdoba y Buenos Aires, hizo que se acordara en 1764 marcar a fuego a los ladrones con una marca de plata.<sup>4547</sup> Asimismo, dicha violencia hizo que las aprehensiones desbordaran los límites jurisdiccionales. En 1770, el Gobernador del Río de la Plata y los Alcaldes de Córdoba intercambiaron correspondencia al respecto.<sup>4548</sup>

Pero la proliferación de padrinos, alimentada por la demanda de mano de obra conchavable, aseguraba la vigencia de una coalición clandestina entre empresarios criollos y esclavos prófugos mucho más fructífera y menos dolorosa para estos últimos que la práctica del cimarronaje. La complicidad de los padrinos, quienes no auscultaban los orígenes de sus obreros jornalizados, escondía al esclavo prófugo --al decir de Debien (1981) para el caso del Caribe Francés-- "...mejor que todos los matorrales de los montes".<sup>4549</sup> Asimismo, el padrinzago de los esclavos fugados operaba como un acicate,

que al mitigar la represión de los amos, fomentaba la fuga. Doña Ana de los Ríos,<sup>4550</sup> declaraba en 1781, que la parda Agustina, "...se me ha profugado y ocultádose, ya el mes, ya los quince días, como lo aseveran varios testigos que expresan le sirvieron de Padrinos, para volverse a casa por haberles rogado mi corrección".<sup>4551</sup> Pero estos mismos padrinos, se hacen cargo, según Doña Ana,

"...que jamás les dijo que el motivo de haberse huido era por no tener con que enterar el salario que dice le impuse, ni menos otra causal alguna que la disculpase, reconociendo en esto mismo no había otra que sus inquietudes".<sup>4552</sup>

Lo que es digno de notarse, según Doña Ana, era "...como podrá componerse que yo le permitiese andar en sus libertades, y temiese por otra parte mis reprehensiones, o castigos, pues buscaba protectores para libertarse de ellos".<sup>4553</sup>

Pese a los sucesivos Bandos dictados en 1766 y 1770 para prohibir el fomento de la fuga, numerosísimos padrinos conchababan esclavos fugados.<sup>4554</sup> Algunos poderes librados en Buenos Aires detallaban la identidad de aquellos que se presumía operaban como encubridores o padrinos y a quienes debía cobrársele el esclavo fugado. Cuanto más importante era el padrino, ya fuere funcionario o vecino comerciante o hacendado, con jerarquía en la milicia local, más factible era el encubrimiento.<sup>4555</sup> El mulato Baltasar, de 35 años de edad, paraba en 1708 en poder del Capitán Jacinto de Contreras, vecino de La Rioja.<sup>4556</sup> El mulato fugitivo Lorenzo residía en 1723 "...en poder del Capitán Manuel Noble Canelo, vecino de Córdoba".<sup>4557</sup> El mulato Lucas, de más de 20 años, fugado en Asunción, se encontraba en 1729 "...según noticias en poder de Gerónimo Flecha".<sup>4558</sup> El mulato fugitivo Adrián se hallaba en 1735 en poder del Capitán Francisco Corvalán, vecino de Mendoza.<sup>4559</sup> El negro fugitivo Antonio paraba en 1763 en "...poder de Pedro Gamboa, Oficial Real de Mendoza".<sup>4560</sup> Y el mulato fugitivo Juan Manuel, de 28 años de edad paraba en 1785 en lo del encomendero Martín Francisco de Torres, vecino de Asunción del Paraguay.<sup>4561</sup> Cuando el conchabado a título de peón era acusado de haber sido esclavo inmediatamente caía en prisión. En 1786, al año de hallarse Fr. Tadeo Gutiérrez en el Fuerte del Carmen, Río Negro, entre los peones que vinieron con el finado Juan de la Piedra para trabajar en una Calera vino un mulato fugitivo de Córdoba, al cual aquél identificó, y por "...este motivo le suspendió el sueldo de peón dicho finado, y lo puso en clase de Presidiario".<sup>4562</sup>

En casos muy particulares el encubrimiento era denunciado en forma explícita. El ex-gobernador de Tucumán Juan de Zamudio otorgó en 1738 un poder a José Luis, pardo libre, vecino de Córdoba, quien operaba como un rescatador mercenario, para vender el negro Luis Pavón "...fugitivo en el Valle de Catamarca, en el río Colorado, donde vive Bernardo Carrizo, que ha tenido dicho esclavo oculto".<sup>4563</sup> A fines de siglo, en 1796, el Capitán y Comandante interino del cuerpo de Morenos libres José García,<sup>4564</sup> fué designado Comisionado para celar la fuga y conducta de los Morenos esclavos, una suerte de Cuadrillero o Jefe de Cuadrilla de Vigilantes,<sup>4565</sup> o de Sambo Rioplatense.<sup>4566</sup> Pero dos años más tarde, en 1798, por motivos que ignoramos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú dio las ordenes para segregarlo a García de dicha labor, derivando la responsabilidad a las Compañías de Morenos "...que están interinamente vajo su mando, como las de Pardos, le auxilién en los casos que lo necesite para el desempeño de la misma comisión".<sup>4567</sup>

Muchos esclavos fugitivos eran vendidos, o rescatados de su eventual cautiverio, a los fiadores o padrinos interesados en su compra o empleo. El mulato Marcos, de 40 años

de edad, andaba en 1782 "...fugitivo en casa de Dionisio Ortega".<sup>4568</sup> Y en 1802, la negra María Joaquina, de 23 años de edad,

"...huída ace cinco días sin saberse su paradero y de resultas de tener presunción que la tiene escondida el mismo [José] Marul después de haberle puesto demanda".<sup>4569</sup>

En algunos casos, la venta era casi forzada porque el esclavo fugado había establecido una familia en el lugar de su exilio. Este fue el caso de María Dominga, una esclava de Juan Roldán, residente del Río Quinto, quien en 1761 fue encarcelada por haber "...huido hace 16 años y vivir en esta ciudad y tener seis hijos con Nolasco Báez, mulato".<sup>4570</sup>

En conclusión, las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles.

## **Epilogo Sección II-E**

En cuanto a la docilidad del esclavo rioplatense, alegada por quienes quisieron desestimar la existencia de una crisis en el orden esclavista, este mito se derrumbó con la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos; la reincidencia del esclavo en la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; las crónicas y cíclicas crisis comerciales que fomentaban la fuga esclava; el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; el rol clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; el uso del aparato represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos.

La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas, económicas, políticas y sociales. Las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles.

## **Sección II-F                      Colapso económico y ruptura del orden mercantilista**

Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura estamental de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento mercantil), habrían sido las crisis comerciales.<sup>4571</sup> En cuanto a

la historiografía de las crisis comerciales propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata y cueros y el doble sometimiento del *entrepôt* porteño al capital comercial metropolitano, establecido en las metrópolis mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.<sup>4572</sup> Si bien todos los que recurren al nivel de la circulación como clave para resolver el problema de la periodización histórica se ven fuertemente influidos por la perseverante presencia de una crisis comercial crónica, hay entre ellos algunos historiadores que ponen un mayor énfasis en el comercio exterior legal o monopolista y otros que lo hacen en el ilegal. Entre los que ponen énfasis en el comercio exterior legal hay quienes buscan la clave en la curva de tonelaje del movimiento naviero (Chaunu, 1955-58; Mauro, 1960; García Baquero, 1977; García Fuentes, 1980; Pérez-Mallaina, 1982) o bien el tráfico real del metálico fletado (Ravignani, 1932; Hamilton, 1934, 1944; Moreyra Paz-Soldán, 1944; Rodríguez Vicente, 1964; Muñiz Barreto, 1975; Garavaglia, 1976-77; Cross, 1978) o bien el tráfico real de las mercancías transportadas (Williams, 1944; Real Díaz, 1959; Mauro, 1960; Nunes Díaz, 1966; Molina, 1966; Ortiz de la Tabla, 1978; García, 1984).

Hay también quienes para resolver el problema de la periodización han buscado establecer una conexión entre la producción y la circulación, evitando así caer presos en las tesis dualistas (Carmagnani, 1976; Twinam, 1977; Ramón, 1978; Tandeter, 1980; Assadourian, 1983; Garavaglia, 1983; Chiaramonte, 1984). Refiriéndose a la historia mexicana pero aplicable a este debate aún inconcluso sobre el Río de la Plata, si bien David Brading hipertrofió el rol que le cupo a los comerciantes en desmedro de los mineros y hacendados a quienes consideraba como grupos vinculados entre sí pero distintos, R. B. Lindley al rechazar la concepción de un grupo puramente mercantil que controlara la economía y el gobierno de la Nueva España”, describiendo en cambio la existencia de una oligarquía a la vez urbana y rural, al igual que simultáneamente productora y distribuidora, es decir agraria y mercantil, ayudaría a entender más claramente aún la naturaleza de la estructura social rioplatense y el porqué del fracaso de las revoluciones burguesas en América Latina.

El error de las tesis acerca de las plazas mercantiles, mineras y rurales coloniales, ha sido no tomar en cuenta que pese a la circulación transitoria del crédito escriturario y la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, la impotencia política para equilibrar los desfases crónicos de la balanza comercial habría frustrado una movilidad y monetización de sus mercados y una capacidad de engendrar una burguesía comercial autónoma.

De la misma manera que en las secciones anteriores hemos analizado la crisis de los ordenes barroco, patriarcal, estamental y señorial, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas del orden mercantilista, en cinco sucesivos capítulos: la crisis del enclave minero y el gremio de azogueros, la crisis de intercambio y la economía de trueque, la crisis agraria colonial y la Real Renta del Tabaco, la crisis pecuaria colonial o el origen de un régimen predatorio, y la crisis mercantil y la lucha contra el monopolio comercial español.

## Índice

- LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial
- LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero
- LL-III Lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.
- LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios.
- LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías.
- LL-VI Fuentes del crédito minero.
- LL-VII Mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.
- LL-VIII Pucheros o mineros independientes.
- LL-IX. Localización geográfica de demanda de dinero.
- LL-X. Agiotismo de los aviadores.
- LL-XI Mordedores y zánganos.
- LL-XII. Crédito eclesiástico.
- LL-XIII Endeudamiento minero.
- LL-XIV Monopolio azoguero.
- LL-XV Réditos o intereses de censos y capellanías.

### **LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial**

La historiografía vinculada con la crisis revolucionaria en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX estuvo íntimamente ligada con la crisis minera del enclave Altoperuano.<sup>4573</sup> La historiografía de esta última crisis, a su vez, ha girado tradicionalmente en la esfera de la circulación, alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos tales como la escasez y carestía del aprovisionamiento de azogue y el doble sometimiento del capital minero Altoperuano al capital comercial de las sub-metrópolis mercantiles o entrepôts de Lima y Buenos Aires. Pero otros autores más recientes, como Assadourian (1980) y Tandeter (1980), insisten en que la causa central del auge y posterior decadencia o crisis de la minería alto-peruana residió en la esfera de la producción. El auge o boom minero aparejó en el enclave económico nucleado por Potosí un flujo de renta interno que expandió en el resto del área otras actividades (producción textil, vitivinícola, mular, y coquera), tanto productivas como de intercambio. Este boom minero previo a la crisis se habría debido, según Tandeter (1980), al incremento de la explotación sufrida por los indios mitayos --al aumentárseles la cuota de metal que debían rendir por igual paga-- así como a la bonanza geológica, al aumentar la ley del mineral explotado.

Sin embargo, el alto excedente generado durante el boom de la plata habría obedecido, a juicio de Assadourian (1980) no sólo al bajo costo que las relaciones sociales pre-capitalistas implicaban sino también a las considerables economías externas que los empresarios de minas e ingenios lograban del desempeño del estado y de sus decisiones políticas en la protección del capital constante social (al invertir en represas, caminos, puentes, etc. [merced a ciertos ingresos fiscales]); y al rol del estado en la provisión de insumos claves (azogue, coca, aguardiente) para la producción de plata. En ese sentido, la composición de puentes, lagunas, cañadas, y otras obras públicas eran claves para el flujo del mineral extraído, pues este se molía hidráulicamente. Para ello, el estado colonial ideó el ramo de la Sisa y mojón de vino y aguardiente (mediante el pago de 20 reales por carga de aguardiente) y el ramo de la botija, media botija, y cuchos (un real por la medida en que

se vende el quintal, medio real por el medio quintal y medidas menores llamadas cuchos y medios cuchos), los cuales proveían de ingentes recursos a las Cajas Reales.<sup>4574</sup>

No obstante, y pese al postrer boom minero, la burguesía Potosina, a diferencia de otras burguesías mineras como la de Antioquia en Colombia (Ospina Vázquez, 1956; Safford, 1965), fue incapaz de consumir un proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación económica, debido principalmente, en opinión de Tandeter (1980), a la delicada ecuación que la demografía mitaya (cuya adquisición absorbía los beneficios brutos) mantenía con la geología del cerro del Potosí.<sup>4575</sup> Sin embargo, últimamente, Assadourian (1980) ha puesto en duda el peso que la sobrecapitalización del trabajo mitayo pudo haber tenido en la estructura de costos de la explotación minera. La reducción de las causas del boom minero a la sobreexplotación del trabajo mitayo y a la bondad de la geología del cerro, padecería de una mono-causalidad ajena a la verdadera realidad experimentada por la industria minera.

Más aún, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis, ésta se habría debido no sólo a la baja de la ley del mineral, y a la escasez de azogue, como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido a la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra sumada al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social y la persistencia de un proteccionismo que la doctrina mercantilista de la corona brindó a la minería, a través de auxilios y subsidios en beneficio de una oligarquía azoguera, agremiada y corrompida - instalada en Potosí -, en perjuicio de los azogueros de giro más reducido, de los trapicheros o pequeña industria minera, y de las demás regiones mineras periféricas. Es evidente entonces, que con la crisis minera, al reducirse drásticamente los ingresos fiscales, la des-inversión del estado colonial respecto del parque de obras públicas le aparejó a los azogueros y mineros en general una abismal gama de des-economías externas.

## **LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero**

La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían sido sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entonces tanto las diferentes fases de la producción como el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe distinguir el costo de la saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina al ingenio, del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio.

Esta aleatoriedad geológica, a la que estaba permanentemente expuesta la productividad minera, requería de un arsenal de inversiones que compensaran dicho déficit. Si bien la rentabilidad de cada ingenio propiamente dicho, con independencia de las minas que los proveían del metal, gozaba de cierta estabilidad en el tiempo, la presencia

en el complejo minero de la incierta y aleatoria rentabilidad de las minas mismas, con independencia del ingenio que beneficiaba sus metales, alteraba radicalmente los resultados finales del proceso productivo minero. En nuestro trabajo, trataremos también de evaluar la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los azogueros y mineros de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación. Esta crisis minera del Potosí habría traído como efecto de arrastre sucesivas crisis en la producción textil de Cochabamba y Tucumán, en la producción de aguardiente del Cuzco y San Juan, en la producción de coca de La Paz (Yungas), en la producción yerbatera de las Misiones, y en la producción mular de Córdoba y el litoral rioplatense, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar el proceso revolucionario. Para el análisis de la crisis minera estudiaremos entonces el rol que pudo haber jugado en la misma el alto precio de los arrendamientos de los ingenios; las altas tasas de interés y la consiguiente carestía del crédito minero; el comportamiento del capital comercial en su relación con el capital minero; la escasez de agua, azogue, y mano de obra; los altos costos de los bastimentos proveídos a los pucheros por los arquiris, cancheros, y tamberos; y finalmente, la estructura de costos de las diversas fases del ciclo de producción minero.

En este particular trabajo nos hemos de reducir a estudiar la naturaleza del Gremio de Azogueros y su nocivo impacto en la estructura política y en la diversificación económica del área minera. Casi siempre las mejoras técnicas, con el consiguiente aumento de la rentabilidad minera, producían la elevación del arriendo de los ingenios de moler metal, afectando el beneficio neto de los azogueros, motivo por el cual éstos, no acometían mejoras técnicas, al no tener seguridad de recuperar en el período del arriendo, el capital empleado y los intereses adeudados. Como era norma entre los azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y equipo. Por ser renuentes a invertir fue entonces preciso también extenderles a través de las Cajas Reales, los Bancos de Rescate, y finalmente el Banco de San Carlos subsidios y líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener en actividad (corriente) los ingenios.

La secular lucha en el seno de las elites coloniales por rebajar el precio de los arrendamientos de los ingenios; por disminuir el precio que los habilitadores cargaban a los suministros de azogue, estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada; por rescatar las barras de plata en Cajas Reales que no fueran las de Potosí; por participar de la conducción del Situado Real; por reducir la tasa de interés devengada a los censos y capellanías; o por condonar las deudas contraídas con las Cajas Reales, reflejaría las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Lo que determinaría la formación de nuevas clases sociales como la burguesía y el proletariado y nuevos modos de producción como el capitalismo habrían sido entonces las que se dieron en llamar, como sostiene Lachmann (1990), contradicciones secundarias o conflictos en el seno de las elites (secundarias por no ser antagónicas), y no lo que tradicionalmente se dio en llamar crisis económicas, o contradicciones principales o fundamentales, o lucha de clases, o guerras de liberación nacional.

Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de una burguesía habría que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los azogueros a elevar la renta debida a los dueños de los ingenios de moler metal; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares y gremiales; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; el control eclesiástico de censos, capellanías y obras pías; la aplicación

del fuero de minería;<sup>4576</sup> y la discriminatoria selección de los miembros del Consulado de Comercio, que se beneficiaban con la conducción del Situado Real. En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron para: a) rebajar las rentas debidas a los dueños de ingenios de moler metal de Potosí, b) condonar las deudas contraídas con los mercaderes agiotistas, y c) rebajar las tasas de interés impuestas a censos y capellanías. Para estudiar estas luchas hemos recogido media docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>4577</sup>

### **LL-III La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.**

La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios de moler metal reflejaba las contradicciones por la renta minera misma entre la elite señorial, propietaria de los ingenios, y la elite productiva o azoguera, arrendataria de los mismos.<sup>4578</sup> Los azogueros arrendaban los ingenios pagando por ellos una renta anual que dependía de la voluntad de los dueños de ingenios. Los dueños de ingenios, algunos venalmente ennoblecidos, y residentes en Lima o Charcas, y no en el asiento de sus intereses (Potosí), poseían las minas e ingenios en propiedad, conjuntamente con el derecho a la mita indígena, y obtenían de ambas una renta fija anual y creciente, que absorbía las ganancias de sus arrendatarios, los llamados azogueros. La lucha de los azogueros con los dueños de ingenios alcanzó su punto más álgido durante las Reformas Borbónicas. Como los azogueros y trapicheros participaban, del excedente generado en la industria minera, conjuntamente con la burocracia real, los primeros construyendo y operando las minas e ingenios, y los segundos contribuyendo con la venta monopólica del azogue y la administración de la Mita; tuvo también la burocracia real que poner un límite a la renta impuesta a los azogueros por los dueños de ingenios y minas.

### **LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios.**

Un índice del poder de los dueños de ingenios era su capacidad de adquirir títulos de nobleza. En 1785 Carlos III extendió el fuero de nobleza a los "dueños de hacienda de moler metales".<sup>4579</sup> De la veintena de dueños de ingenios y minas de Potosí en la segunda mitad del siglo XVIII cuatro poseían títulos nobiliarios: el Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra;<sup>4580</sup> el Contador de la Casa Real de Moneda Marqués de Casa Palacio José Palacios;<sup>4581</sup> el III Marqués de Santa María de Otavi Joaquín José de Otondo,<sup>4582</sup> y el Conde de San Miguel de Carma Domingo Pedro de Herboso y Astoraica.<sup>4583</sup> Pero no obstante su nobleza titulada, los dueños de ingenios no pudieron evitar que a comienzos del siglo XIX se congelaran los arrendamientos de los ingenios de moler metal.

### **LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías.**

La lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías, reflejaba también las contradicciones por la renta agro-minera misma. Como los dueños de ingenios y haciendas de ganados y cicales participaban del excedente generado en la minería, agricultura y ganadería, conjuntamente con la burocracia eclesiástica, los primeros operando los ingenios y las haciendas, y los segundos contribuyendo con los servicios religiosos (bautismos, matrimonios, entierros y misas) y los fondos líquidos para habilitar

el giro de dichas empresas; tuvo también la burocracia real que poner un límite a la renta impuesta a los dueños de ingenios y haciendas por los conventos acreedores de censos y capellanías.

#### **LL-VI Fuentes del crédito minero.**

En primer lugar, los productores mineros y rurales recurrían a los Mayordomos de capellanías y obras pías y a los Corregidores,<sup>4584</sup> para obtener el dinero con el cual habilitar el giro de sus empresas y pagar las gruesas rentas debidas a los dueños de las mismas. En la tarea de requerir crédito, el buen nombre y honor de los productores mineros o azogueros era la mejor garantía con la cual poder obtener el dinero a título de préstamo. Cuando esta gracia no les era concedida por los Corregidores, los comerciantes provenientes de las provincias de abajo o los Mayordomos de Capellanías, los azogueros no tenían más remedio que endeudarse, en un principio con los Mercaderes de Plata, luego con el Banco de Rescates, y más luego, una vez incorporado a la Real Hacienda, con el llamado Banco de San Carlos. Quienes en el Alto Perú, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los ingenios y las haciendas de cicales se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla S-I enumera una lista de comerciantes residentes en el Alto Perú que a lo largo del siglo XVIII concurren a Buenos Aires para proveerse de los insumos necesarios para operar sus tiendas y/o unidades productivas.<sup>4585</sup>

#### **LL-VII Los mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.**

Bloqueada la capitalización minera autónoma, sólo le cabía entonces al azoguero -- como bien lo explica Salazar (1985) para el caso de la minería chilena-- la capitalización dependiente, asociándose a un mercader "habilitador", llamado Mercader de Plata. Este último suministraba dinero efectivo, al decir de Cañete (1952)

"...para el pago de los crecidos salarios de los trabajadores, para la compra de los costosos materiales que necesitan y para la continua habilitación de las minas, ya aguadas o empobrecidas por otras causas".<sup>4586</sup>

Siempre que no se guardara una cierta cantidad de efectivo con prohibición de extraerse fuera del reino para ser utilizado en la adquisición de maderas, hierro, plomo, cobre, sal, azogue, carbón y otros mil insumos que se necesitan en la azoguería, Cañete advertía que "...sería preciso que todo se hiciera sobre crédito, que aún no se ha establecido por estas partes en su verdadero pié ni es fácil de establecerse".<sup>4587</sup> Sobre la base de estas realidades la Corona fundó, según Cañete (1952), providencias para que en todas las Casas de Moneda del Reino, "...se labre cada año determinada cantidad de moneda, prohibiéndose su extracción fuera del continente, con el interesante fin de fomentar el comercio interior de unas provincias con otras".<sup>4588</sup>

#### **LL-VIII Los pucheros o mineros independientes.**

Como es sabido, antes de que se difundieran los Bancos de Rescate los mercaderes explotaban a los pucheros (mineros independientes) a discreción. Más luego, con la

implantación de dichos Bancos, fueron estos mismos Bancos quienes corrieron con gran parte de los avíos de azogue y plata, quedando la habilitación de los bastimentos a cargo de mercaderes independientes. En los contratos de habilitación, los mercaderes se obligaban a suministrar a los mineros: bastimentos, pólvora, velas, azogue, herramientas, madera, coca y otros insumos. Eventualmente, los habilitadores o aviadores tomaban a su cargo todo el pasivo de la actividad minera: pago de jornales, de transporte y de flete en los trapiches y fundiciones. El cargo o debe de las cuentas corrientes de los mineros era cubierto enviando a los mercaderes remesas de mineral, conforme un precio de los insumos suministrados previamente acordado, pero que los mercaderes solían subir. La duración de estos contratos de habilitación dependía de la ley del mineral producido y del crecimiento de la deuda del minero. Si la ley del mineral bajaba, la mina se depreciaba, y los habilitadores dejaban de adelantar los insumos necesarios para la producción. Frente a la depreciación continua de sus minerales, al precio recargado de los suministros y a la tasa de interés usurario aplicado a las deudas que contraían, los mineros terminaban por declararse insolventes. Si la mina, por el contrario, producía un rendimiento normal, la deuda del minero crecía geométricamente, y en igual proporción la ganancia del mercader.

#### **LL-IX La localización geográfica de la demanda de dinero.**

En cuanto a la posibilidad de rescatar el mineral, esta operación tuvo en el Alto Perú mucho que ver con la localización geográfica de la demanda misma de dinero. Muchos de los productores independientes de metal, denominados pucheros, cuando requerían de dinero o insumos, acudían por crédito a los aviadores y azogueros potosinos y estos últimos a los Mercaderes de Plata "...para que socorridos y auxiliados con el fomento que necesitaban pudieran contraerse al beneficio de sus metales y rendición de marcos con que les pagaban".<sup>4589</sup> Se puede suponer, como lo hiciera Bakewell (1986), que los fondos que usurariamente prestaban los Mercaderes de Plata, derivaban de las ganancias que habían realizado en el procedimiento de conversión de la plata y el oro en moneda, o del interés que habían acumulado al prestar dinero en ocasiones anteriores. El Mercader de Plata era el negociante que compraba la plata y el oro refinados a los refinadores y se encargaba de la conversión de estos metales en moneda, llevándolos por los distintos trámites del pago del impuesto real (quinto, diezmo, etc.) en las Cajas Reales, y del pago de varios impuestos y costos en la Casa de Moneda, donde la plata y el oro se convertían en moneda contante y sonante.<sup>4590</sup>

#### **LL-X El agiotismo de los aviadores.**

En lugares alejados de Potosí, como eran los casos de La Paz, Oruro o Aullagas, Provincia de Chayanta, donde no existían Casa de Moneda ni Bancos de Rescate, los pucheros (mineros independientes) estaban sujetos al agiotismo de los aviadores. En La Paz, el oro era quintado en las Cajas Reales valuando la onza en \$16 y practicando la operación del ensaye por el método del cotejo de puntas.<sup>4591</sup> Aunque el Virrey Cevallos insistía en la conveniencia para el Rey y el público de que se quintase el oro en Potosí y no en La Paz, los Oficiales Reales y los Diputados del Comercio de La Paz manifestaban en 1780 "...muy dificultoso y cuasi insuperable el que ni los mineros ni sus aviadores puedan llevar el oro a Potosí, los primeros por la cortedad de sus facultades".<sup>4592</sup> A excepción de uno que otro, los mineros "...se ven en la obligación de vender en el mismo lugar de minas

en corto número lo que van sacando por onzas y adarmes, exigiendo se les anteponga el dinero o avío, por la cortedad de sus arbitrios en laborear".<sup>4593</sup> Cuando, por el contrario, no encuentran en sus labores quien les compre "...pasan a las capitales a venderlo allí, observándose ser esto en escaso número".<sup>4594</sup> Con que si a los mineros se les deparaba dificultoso el venir aún a La Paz, "...con cuanta más razón les sucederá recresiendo [Potosí] mayor distancia".<sup>4595</sup> También el Ensayador de las Reales Cajas de La Paz, Don Diego de la Riva, enterado del Despacho informaba

"...que no sólo era difícil el que ocurriesen a ensaye real a la Casa de Potosí sino que era imposible se redujesen los trajinadores a este viaje,...y que, sobre todo, el trato se haría venal; pues harían tratados secretos y no pagarían el quinto y quedaría el público descubierto".<sup>4596</sup>

En cuanto a la sujeción económica a que estaban expuestos los mineros y aviadores en lugares como Oruro o Aullagas, ésta les hacía perder entre 4 y 6 3/4 reales por marco de plata vendido, o un descuento correspondiente entre el 7 y el 12%. Mientras que en Potosí el marco de plata se satisfacía a 7 pesos y 2 3/4 reales cada uno, en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y en los de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el marco.<sup>4597</sup> De suerte que no subiendo de 10 reales el costo de convertir cada marco de plata en moneda, le quedaba al habilitador en cada marco de las placas de Carangas, la ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro de 4 a 5 reales.<sup>4598</sup> Como se habilitaba a los pucheros con avíos de azogue, estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada, por lo general sobre-facturados, se lograba con esto "...conocida utilidad dando mayor aliento con este hecho a que con libertad pasen a robar de las labores e intereses de todo el Asiento de Aullagas sin que pueda haber sujeto que los contenga".<sup>4599</sup> De aquí el porqué el dinero sencillo tenía en Potosí, en palabras del Visitador Ventura de Santelices y Venero, dirigidas al Gobernador de Buenos Aires José de Andonaégui, "...más amancebados que en otras partes, por el uso que se puede hacer de él en cualquier dilación de remitirlo [a los Situados]".<sup>4600</sup>

## **LL-XI Los mordedores y zánganos.**

Pero como sin especial licencia real no se podían poner en Indias estancos o Bancos de Rescate de mineral, en aquellos lugares como Aullagas, que carecían de ellos, los Corregidores y sus Tenientes, y a veces hasta los Curas Párrocos, eran los que prestaban los avíos de azogue, estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada a los mordedores y zánganos. Estos últimos no tenían "...otro oficio que el de entrar en las labores a desbaratarlas y robarlas por la utilidad que tienen de ganar en cada marco por lo menos cinco a seis reales con la que se agrega de plomo y azogue".<sup>4601</sup> Dichas utilidades se realizaban en los rescates de barras, los cuales eran practicados preferentemente en Oruro y Chucuito y no en Potosí.<sup>4602</sup> Esta preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de Oruro y Chucuito se toleraba que las barras se fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito. Los rescatadores de las Cajas de Oruro eran vecinos de la villa, y excepcionalmente originarios de otras ciudades.<sup>4603</sup> Por el contrario, en las Cajas de Potosí, desde que el Conde de Chinchón lo impuso en 1630 y lo confirmara el Reglamento del Real Banco de San Carlos, los fundidores no podían hacer barras de más de 130 a 140 marcos la mayor. Toda barra que excedía este peso defraudaba al fisco y merecía la pena de 100 pesos ensayados cada una. Pagándose en la Casa de Moneda de Potosí el derecho de avería de la plata producida por el número de piezas y no

por peso, a razón de \$5 cada una, aquellos azogueros --aunque fueren de la Rivera de Potosí-- que fundían sus barras en las Cajas de Oruro, obtenían pingües ganancias a costa del erario real.<sup>4604</sup> Claro está, que de las diferencias consiguientes se beneficiaban sólo los grandes azogueros, únicos capaces de poder transportar hasta Oruro grandes cantidades de piñas, pues los pucheros y pequeños mineros no podían hacer redituár dicho viaje por unas pocas piñas. En el caso del cacique Juan de Dios Helguero, vecino de San Pedro y San Pablo, las ganancias, fruto de la habilitación a los pucheros, las repartía con el Subdelegado José Hermenegildo de la Peña y con el cura y vicario de San Pedro y San Pablo, el Dr. Juan José de Artajona y Eslaba. Los Subdelegados y los Curas Párrocos como los Corregidores antiguamente, eran al decir del Virrey Amat "...unos diptongos de mercaderes y jueces, de suerte que en ellos se juntaba la vara del comercio con la de la justicia".<sup>4605</sup> Dicho cacique (Helguero) manejaba la plata de los Reales Tributos, utilizándola semanalmente en el rescate de piñas --que tanto hacía en los ingenios de Pataca, Amaya, y Belén como en los demás trapiches. El fruto de dicho rescate lo remitía a Oruro, donde las piñas eran reducidas a barras. Esto lo lograba dicho Cacique "...demorando los enteros de los tercios de aquellos [Reales Tributos] en la Real Caja, con perjuicio del Real Haber, y tolerancia precisa del Subdelegado".<sup>4606</sup>

## **LL-XII El crédito eclesiástico.**

Finalmente, en cuanto al crédito eclesiástico propiamente dicho, muchas veces los azogueros estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y Mayordomos de cofradías y capellanías, los cuales se negaban a conceder préstamos bajo excusas de naturaleza extra-económica.<sup>4607</sup> En ausencia de estos recursos, los azogueros debían recurrir a burócratas inescrupulosos que les adelantaran a tasas usurarias los fondos de las cajas reales. Estos funcionarios solían ser los Administradores de la Renta de Tabaco y Naipes, de la Renta de Correos, de las Cajas Reales, o de la Bula de la Santa Cruzada, o los conductores de los Situados Reales, pues sólo ellos podían garantizar el rápido acceso a efectivo contante y sonante.<sup>4608</sup> Por ejemplo, el Ministro Contador de las Cajas Reales Juan Muñóz Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, confesaba en 1803 que su quebranto de la Caja de Carangas en \$84.968,<sup>4609</sup> fue el resultado

"...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".<sup>4610</sup>

A su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".<sup>4611</sup>

## **LL-XIII El endeudamiento minero.**

A medida que la crisis minera se acentuaba,<sup>4612</sup> las contradicciones que se dieron en el seno de la propia elite se agravaron. Las contradicciones por la renta minera que se dieron al interior de dicha elite se reflejaron primero en la lucha por la conducción del Situado Potosino, entre los sectores hegemonizados por el Coronel Indalecio González de

Socasa,<sup>4613</sup> y el comerciante, Regidor y Contador Juan de Ybieta y Endeiza,<sup>4614</sup> ya relatadas en otro escrito del autor,<sup>4615</sup> más luego por las repercusiones de la escasez de agua, azogue y mano de obra, también expuesta en una serie de trabajos recientes,<sup>4616</sup> y más luego en la lucha por evadir el pago del endeudamiento de los azogueros para con el Real Banco de San Carlos. El fracaso del Socabón Real y del método de los barriles giratorios promovido por la Misión Nordenflicht había contribuido gravemente a este endeudamiento.<sup>4617</sup> A tal "equilibrio de terror" llegó esta deuda,<sup>4618</sup> que ya no quedaba en el espacio de relaciones de poder otra opción, para los deudores, que repudiar la deuda unilateralmente, y para el bloque acreedor, representado por el Real Banco de San Carlos, que suspender el flujo de recursos. Por ello se acordó arbitrariamente en que pagaran justos por pecadores, socializando las deudas, pues para la cancelación de las mismas y para seguir manteniendo el flujo de recursos se acordó un compromiso mediante el cual todos los miembros del gremio de azogueros, incluyendo los dueños de ingenios, serían responsabilizados conjuntamente.<sup>4619</sup> Asimismo, para con las deudas anteriores a 1796, se sugirió un método de cobranza por medio de un descuento semanal de un medio a un real por marco de plata vendido al Banco. Como para llevar un giro capaz de producir algo de plata era preciso explotar en las minas cuando menos una cantidad igual de metales a la que se beneficiaba en los ingenios, era indispensable, según le expresaba en 1803 Manuel José Vélez al Virrey, practicar el gasto en el Cerro y por consiguiente era también indispensable contar con el circulante metálico necesario para poner la empresa minera en operaciones.<sup>4620</sup> Pero si el descuento en el precio de los marcos de plata era excesivo aquellas operaciones se volvían imposibles. Mas los auxilios con que los azogueros eran habilitados por el Banco no eran inmutables. Cuando pese a los auxilios, los azogueros no entregaban piñas al Banco, éste se los suspendía, operación a la cual también le llamaban Descuento, por cuanto el Banco al momento del rescate de los marcos de plata entregados les descontaba las semanas que no habían trabajado. Ello generó toda suerte de críticas, por cuanto los azogueros alegaban que

"...no pretenden la suspensión de los descuentos de las semanas en que hacen lava e introducen piñas, sino de aquellas [semanas] en que quiebran o dejan de hacerlas por ser forzoso...mientras dure la falta de manos trabajadoras..."<sup>4621</sup>

El creciente endeudamiento de los azogueros Potosinos generó a su vez un profundo descontento entre aquellos mineros y azogueros de otras regiones del Alto Perú, como fue el caso del Coronel González de Socasa, que por no gozar de los Auxilios del Real Banco de San Carlos, se veían afectados por los irritables privilegios de que gozaban los Potosinos. Por sólo conservar la Villa Imperial de Potosí, la Corona privaba a Oruro, Aullagas, Porco, Lípez y otras regiones mineras del privilegio del azogue, la mita indígena y los auxilios del Real Banco de San Carlos. Esto era lo mismo que decir que el minero de las vetas más ricas y que trabajaba bien ganaba mucho con las piñas que conseguía producir, y que era entonces lógico sacarle parte de su precio para compensar al que producía las piñas en ingenios con minas más pobres o que trabajaba mal. Es lícito entonces preguntarse ¿porqué se intentó un sistema que le quitaba ventaja al que producía plata donde era más rentable y que, por el contrario, auxiliaba al que producía sólo a costo elevado? Producir en el lugar más apropiado y por los mejores métodos era una obligación de todo productor minero para con la corona. Pero cumplir con esa obligación requería esfuerzos, que merecían premio y no castigo. Producir más y mejor costaba trabajo y dinero, y no se hacía el trabajo ni se invertía el dinero si el esfuerzo no era compensado. Era natural que el minero o azoguero que hacía inversiones razonables y bien elegidas para mejorar su producción, consiguiera bajar el costo de la piña de plata que producía. Para eso

hacía el esfuerzo, para producir más barato las piñas que otros producían más caro, y así aprovechar las diferencias. Pero ¿para que lo haría, si regía permanentemente el sistema de quitar al minero o azoguero que producía piñas más barato, toda la diferencia que media entre producir eficazmente y a bajo costo y producir mal y caro? Instalar la producción de plata en las minas más ricas y producir con eficiencia, exigía trabajos y sacrificios mucho mayores que los que hacían aquellos que por comodidad, mas que por razones de productividad, establecieron y mantuvieron sus minas y sus ingenios a poca distancia de Potosí y Oruro. No es de menor consideración entonces, demostrar, como lo hiciera Cañete,<sup>4622</sup> en un escrito elevado al Virrey del Pino el 26 de Diciembre de 1801, "...la notable injusticia que sufrirían los azogueros que deben menos, con pagar por el que debe más".<sup>4623</sup> En este escrito --cuya copia en Sevilla utilizara parcialmente Buechler (1977)-- Cañete confiesa no entender los motivos por los cuales los azogueros menos endeudados podían convenir en una desigualdad tan injusta,

"...En lo absoluto nadie quiere pagar lo que otro debe sin cambio equivalente. Lo que hace presumir que [los azogueros menos endeudados] consintieron en el Proyecto, o bien por no haber entendido sus inconvenientes y resultas, o bien porque los más pobres que deben menos, temen su propio sacrificio por embargos y execuciones sino se remedia la quiebra del Banco de cualquiera modo, o bien porque piensan evadirse de la paga por otros arbitrios que no alcanzamos en el día",<sup>4624</sup>

De acuerdo a las Ordenanzas del Perú, alegaba Cañete, no se debía "...permitir que ningún [azoguero] trabaje más ingenios que los que no pasaren de cien indios,...ni que se les contribuya [a los azogueros] más azogue que aquel que fuere preciso para el trabajo de un mes".<sup>4625</sup>

#### **LL-XIV El monopolio azoguero.**

El monopolio constituido por Luis Beltrán de Orueta,<sup>4626</sup> el Dr. Juan José de Vargas y Flor,<sup>4627</sup> y Pedro Antonio Azcárate,<sup>4628</sup> que a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hegemonizaba la producción de plata y monopolizaba las Diputaciones del Gremio de Azogueros era lo que le preocupaba a Cañete, de modo que su posición no era fruto de un resentimiento, como lo presume Buechler (1977), o de la defensa de los dueños de los ingenios como lo sugiere Villava, sino producto de una honda y honrada meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí.<sup>4629</sup> Como consecuencia del incumplimiento de las Reales Ordenanzas

"...dos o tres azogueros [Orueta, Vargas y Azcárate], reúnen entre sí [en 1801], una mitad de la fuerza de todo el Gremio...Ahora mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Vargas y Azcárate, y siguen con la mira de abarcar los que vacaren en adelante en teniendo abundancia de Mita: sin que parezca extraño el poder pronosticar que al cavo de algunos años vendrá a parar toda la Rivera en solas seis o siete manos".<sup>4630</sup>

En cuanto a los auxilios semanales que los azogueros recibían de manos del Real Banco de San Carlos, Cañete agregaba:

"...Ya he dicho que en las quince semanas debe percibir Bargas 30 mil pesos, Orueta 24 mil pesos, y Azcárate 12 mil y más, y entre los tres cerca de 70 mil pesos, que es casi una mitad [35%] de los 200 mil".<sup>4631</sup>

Cañete ponía fin a su alegato, precabiendo acerca de las consecuencias de este desorden:

"...no tanto por la dificultad de la cobranza, a unos sugetos que nunca han sido tenidos por poderosos, quanto por los grandes abusos que fácilmente pueden introducir contra el buen servicio de la mita, y contra el buen orden de las Minas con las pretenciones ambiciosas, que son consiguientes a tan grande extensión de empresas, después de la prepotencia que han adquirido sobre todos los demás Azogueros para hacer valer su voz por la del Gremio entero a favor de sus intereses particulares".<sup>4632</sup>

En cuanto al monopolio del Gremio, en cuyas elecciones (cuatro por Diputados y tres por Dueños), se venían repitiendo Luis de Orueta, Pedro Antonio Azcárate y José Ignacio Lapeyra y Zabaleta,<sup>4633</sup> sin guardar el debido hueco, el 27 de Agosto de 1800 estalló la crisis, cuando estos últimos fueron suspendidos en sus Diputaciones por orden del Gobernador-Intendente Francisco de Paula Sanz, quien en su Superior Orden manifestaba

"...que por ningún pretesto pueda en adelante alterarse aquella disposición ni reelegirse por esta vez a los actuales Diputados; sino que el nombramiento o elección haya de recaer en personas imparciales, para que así se logre la mayor quietud y tranquilidad del Gremio".<sup>4634</sup>

Seguidamente, en su Oficio No.2, el Gobernador-Intendente sostenía que los firmantes del recurso cuestionando a Orueta, Azcárate y Lapeyra "...son verdaderos parciales y que...debieron quedar excluidos de poder obtener estos cargos [voz pasiva], del propio modo que Orueta y sus compañeros para no poder ser reelectos".<sup>4635</sup> Pero el caso fue que a los cuatro meses, en las elecciones de enero de 1801, volvió a triunfar el sector liderado por Orueta y Azcárate, obligándolo a Cañete a deducir un recurso de nulidad, donde cuestionaba la atribución de parcialidad, y la falta del secreto en las elecciones, que el Gobernador-Intendente Francisco de Paula Sanz rechazó de plano. Decía Cañete "...Ahora veo a éste [Orueta], salir reelegido con más autoridad que antes, con sonido de perpetuidad para los únicos negocios graves de la azoguería y para los mismos que motivaron su separación en el Superior concepto de S. E.". <sup>4636</sup> Orueta y Azcárate habían elegido por Diputados ordinarios a su pariente Don Pedro Arrieta, a su dependiente José Antonio de Estévez,<sup>4637</sup> y a su poderdante Salvador Fullá,<sup>4638</sup>

"...con votos mendigados y nulos, para hacerse más dueños que antes del sufragio de los Azogueros y obtener cuanto quieran contra mí y contra otros a su favor por votos involuntarios por no perder la gracia y la Protección de los Diputados en las pretenciones continuas que hacen para remedio de sus necesidades notorias".<sup>4639</sup>

En virtud de estas denuncias, Cañete suplicó por segunda vez al Gobernador-Intendente se sirviera contestar si para votar D. Luis Orueta, el Conde de Casa Real de Moneda,<sup>4640</sup> y el Dr. Mariano Urquizú,<sup>4641</sup> manifestaron sus respectivos poderes de D. Salvador Fullá, de la madre (Margarita Rosa Centeno) y hermana del Conde (Isabel de Lizarazu), y del finado Juan Antonio Fernández Dorado.<sup>4642</sup> Asimismo, Cañete preguntaba

"...si votó efectivamente con el de D. Juan de Dios Pemintel, si este no es Azoguero ni ha sido citado para ninguna Junta antes que subrogase la Diputación del Difunto Zamudio. Si Fullá tiene su formal residencia en Guariguari siete leguas de Potosí, donde solo viene accidentalmente para el despacho de los Correos: si a D. Pedro Arrieta se le consideró sin voz activa en dicha Junta: Si el Escribano citó por voleta

a todos los incorporados y no incorporados de orden de V.S. y si habiendo empezado la elección por los votos cerrados de dos enfermos, y algunos Azogueros mas se volvió a repetir empezando otra vez por los Diputados con votación pública por las dificultades que expuso el Dr. Vargas referidas en mi anterior oficio".<sup>4643</sup>

Por otro lado, Cañete aducía que la interpretación de la Orden por la cual fueron excluidos de la voz pasiva, acusados de parcialidad, los que habían impugnado en Agosto pasado a Orueta y Azcárate, y otros más como el Pbro. Mariano Urquisu, Da. María Teresa Menéndez,<sup>4644</sup> Dn. José Franco, Dn. Vicente Bautista y Dn. Asencio de Arismendi, los cuatro primeros con mita y el último sin ella, era "...abusiva y arbitraria", y hecha con el ánimo de

"...sorprender la Junta y poner embarazo con las disputas y providencias, que eran fuera de aquel caso para que sus paniaguados fixasen con certeza los votos, y los otros condenados por parciales, o se arrimasen a ellos por no perder del todo la gracia o disparasen sobre diversas personas en términos de no poder constituir elección".<sup>4645</sup>

Para que la parcialidad fuera nota criminal, Urquisu sostenía que "...no basta qualesquiera unión o confederación con algunos, separándose del común, y formando cuerpo aparte; y es necesario que el fin sea ilícito, para que siendo culpa merezca castigo".<sup>4646</sup> En cuanto a la falta de secreto en las elecciones, Cañete argumentaba que

"...componiéndose la Azoguería de una porción de hombres de bien, pero abatidos por sus necesidades no hay uno que quiera romper hablando mientras no abren dictamen los Azogueros más principales, que siempre son los Diputados, por sus facultades, y por sus respetos, y se dejan dirigir tan ciegamente por la vos de estos, que no son capaces de decir cosa alguna contra lo primero que oyeron, aunque hayan de salir después blasfemando de la Junta".<sup>4647</sup>

Por último, de resultas de la protesta de Cañete contra el monopolio de la industria minera por parte de un ínfimo grupo de Potosinos, el gremio de azogueros acordó en Enero de 1804, exonerar de la contribución de un real por marco a los mineros provincianos. Sin perjuicio de dicha exoneración, la deuda acumulada por el Gremio de azogueros para con la Real Hacienda le hacía pronunciar a Cañete un año más tarde que

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el lujo escandaloso de sus casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".<sup>4648</sup>

## **LL-XV      Los réditos o intereses de censos y capellanías.**

Las contradicciones por la renta agro-minera que se dieron en el seno de la propia elite se reflejaron también en la lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías. El riesgo corrido es la explicación que daban los acreedores por las altas tasas de interés prevalecientes en el mundo colonial.<sup>4649</sup> Por el contrario, en la Europa del siglo XVI, lo que resulta verdaderamente significativo no fue la caída del salario sino la caída de

la renta de la tierra y de la tasa de interés. La tasa de interés en los Países Bajos cayó en el curso del siglo XVII en más de un 50%, del 6 1/2 al 2 1/2%, forzando la caída de las tasas en Inglaterra y Francia y también en España. Ya en tiempos de Felipe II se redujeron los réditos de los censos a razón de 14 mil el millar, que corresponde a 7 1/7%, cuya reducción supone que entonces estaban más altos. Posteriormente, Felipe III los bajó a 20 mil el millar, que era el 5%, y últimamente Felipe V los redujo a 33 mil y un tercio el millar, que fue al 3%.<sup>4650</sup>

Más en el interior del espacio colonial americano, el alza de la tasa de interés y la cuantía de dinero puesto a réditos oscilaba con la localización y la oportunidad del préstamo. Es evidente que cuanto más cerca del polo minero de Potosí uno se hallaba más alta era la tasa de interés y más difícil era hallar capellanía u orden religiosa que estuviese dispuesta a dar dinero a réditos. A contrario sensum, cuanto más lejos del área minera y más cerca de los puertos de salida --a la inversa del premio de la moneda doble-- más baja era la tasa de interés y más fácil era hallar dinero a réditos. El descenso notable de las tasas de interés en las metrópolis nos lleva entonces a comprender el aliento que sufrió en ellas la propensión a invertir y explicaría entonces el alza que sufriera el precio de la tierra. A la inversa, la tremenda alza de las tasas de interés en el mundo colonial nos lleva, en cambio, a inferir que en él existía un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo lo cual explicaría en parte el congelamiento del precio de la tierra. Al menos en las fincas de cacaos de Yungas,<sup>4651</sup> las unidades económicas se hallaban tan gravemente hipotecadas que su producción no alcanzaba a cubrir el servicio de sus deudas.<sup>4652</sup>

Aparentemente el mismo fenómeno de extremo endeudamiento afectaba a Cochabamba, pues el 5 de abril de 1783 el Cabildo de Cochabamba elevaba al Rey una representación pidiendo se rebajaran los réditos de los censos impuestos sobre las fincas destruidas por la rebelión indígena. Pero el Cabildo Eclesiástico de Cochabamba, una suerte de clase rentista señorial,<sup>4653</sup> alegó en defensa de sus intereses que el Cabildo secular había padecido engaño en "...suponer destruidas las fincas o haciendas de la provincia con la Sublevación de los Indios".<sup>4654</sup> Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la mayoría de las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los confines de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para el pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la situación de los censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de sus tierras, el Cabildo Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las pensiones de éstas".<sup>4655</sup> Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía a su lealtad".<sup>4656</sup>

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y piadosas memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o principales impuestos sobre las fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los censos "...se perjudicaría no sólo el censalista, sino también claudicaría la disposición del fundador".<sup>4657</sup> Si un censalista instituía una capellanía de \$4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a \$8 cada una, sobre los \$200 de sus réditos, de

rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo \$120, a razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que quedaba indotada parte de ellas".<sup>4658</sup> Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la Provincia de La Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos perpetuos. No obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba "...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no da mérito a la pretendida reducción de censos".<sup>4659</sup> Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia y deterioro en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no sólo de La Paz, sino también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba no tener noticia de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja que intentan estos hacendados".<sup>4660</sup> El argumento del Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cicales, en que principalmente consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".<sup>4661</sup> Ellos no fueron destruidos porque los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cicales "aprecio y estimación".<sup>4662</sup> Aunque algún deterioro sufrieron los cicales por falta de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron quemados los caseríos "...se repararon y repusieron sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó este fruto en los tiempos inmediatos de la sublevación".<sup>4663</sup> Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no poco los hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios de sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus caudales, y quiza de engrosarlos".<sup>4664</sup>

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de Portobello en 1740.<sup>4665</sup> Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con motivo del sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los cicales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a una rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la rebaja de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio ocasionada por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese por evitar las terribles enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos morosidad y escusación de gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porque si las haciendas perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó igualmente de su estimación, sin que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la reducción de sus pensiones".<sup>4666</sup>

Pero, a diferencia del caso de Panamá, se preguntaba el Cabildo Eclesiástico de La Paz si se podría alegar que la Rebelión de los Indios había inferido igual decadencia en las haciendas de cicales. Los perjuicios involuntarios y pérdidas sucesivas que argumentaron los vecinos de Lima y Panamá fueron permanentes, mientras que los de La Paz fueron transitorios, "...y el cultivo los reparó con el valor de sus mismos frutos".<sup>4667</sup> A tal extremo fue esta reparación que el comercio y abundancia de La Paz se hallaba cada día en mayor auge, "...pues sin hablar del lujo que se observa principalmente en el otro sexo, aún en

personas de inferior clase, es innegable".<sup>4668</sup> No estaban pues los hacendados de La Paz en la triste necesidad de los de Panamá pues éstos, "...con la ruina de su comercio y ninguna estimación de sus frutos se veían precisados a hacer diariamente dimisión de sus fincas".<sup>4669</sup>

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi, y muy probablemente conocedor de las posiciones de Sancho de Moncada y de Leruela,<sup>4670</sup> y consciente del atraso económico del mundo colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber repetido en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había producido en la metrópoli española.<sup>4671</sup> El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales era, en el concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede presentarse a los que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".<sup>4672</sup>

Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la opinión de Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el haber pocos prestadores; y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno de estos dos motivos se verificaba en las colonias, en donde al decir de Villava la masa del dinero es respectivamente [por relativamente] mayor que en España,

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a los frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro por otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del dinero es mayor respectivamente".<sup>4673</sup>

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el comercio era menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la abundancia, y esta proporciona la baratura". Mas luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava, por las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".<sup>4674</sup>

En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la agricultura, facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las fábricas y los obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la agricultura exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas

[rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuarios [deudores hipotecarios]?"<sup>4675</sup> Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde el siglo XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la Pragmática de Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus roncós alaridos, y abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han determinado la reducción según las circunstancias".<sup>4676</sup>

A comienzos del siglo XVIII los religiosos en el Perú, a juzgar por lo descrito por Burga (1979), se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región. Los censos y capellanías sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban \$322.418 y redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio del 4% anual, \$12.896. Contrariamente, los propietarios se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un cambio masivo de propietarios.<sup>4677</sup> En tales circunstancias, aunque hubiera convenido implantar en las colonias la Ley del año de 1705 rebajando los censos al 3%, a fines de siglo Villava reconoce que no deberían rebajarse sino al 4% pues

"...apenas en España se encuentra ya quien dé su dinero al 3%, y para hacer ilusoria la ley se han inventado otros contratos: el aumento del comercio, del lujo, y de la población ha subido insensiblemente los réditos, y el mismo monarca en sus empréstitos se ha conformado con el curso natural de las cosas, prometiendo y pagando el 4% en sus villetes que son una representación de los capitales".<sup>4678</sup>

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época Villava reflexionaba con argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes cuestionan las altas tasas de interés de la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas públicas de la América Latina

"...La rebaja general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, sería útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin ella con las continuas execuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas fundaciones de capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".<sup>4679</sup>

Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.<sup>4680</sup> Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.

## Capítulo II-F-15

### **Desequilibrio del intercambio y economía de trueque**

#### Índice

- M-I Ajustes mutuos en la complementariedad de las economías agrícola-ganaderas
- M-II Oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante.
- M-III Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero.
- M-IV Desvalorización de las especies monetizadas.
- M-V Paridad entre el peso hueco y el metálico.
- M-VI Provisión de bastimentos a los estancieros.
- M-VII Velocidad de rotación del circulante.
- M-VIII Diferencias estacionales entre regiones.
- M-IX Introducción de moneda metálica.
- M-X Almacenamiento de las especies monetizadas.
- M-XI Monetización de los frutos de la tierra.

#### **M-I Ajustes mutuos en la complementariedad de las economías agrícola-ganaderas**

El error de quienes han incursionado en la temática sobre el medio rural colonial ha sido no tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Paraguay, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda Oriental) en su conjunto. A diferencia del territorio bonaerense, esencialmente pecuario, el litoral estaba constituido por economías agrícolas de plantación en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción de bienes para la exportación (yerba, tabaco, cueros, etc.). Los pueblos de indios de Misiones aseguraban -- parafraseando a Assadourian-- el proceso de reproducción de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en yerbales y vaquerías.<sup>4681</sup>

Las economías de enclave, como fue el caso de los beneficios de yerba en el Paraguay, la minería altoperuana y las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a los yerbales silvestres del norte Paraguayo y a las corambres de las rinconadas del Litoral y la Banda Oriental.<sup>4682</sup> Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, los actores más activos en la movilización de la energía campesina hacia la producción mercantil (beneficio de yerbales y corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y Administradores.<sup>4683</sup>

Pero las diferentes economías agrícola-ganaderas que se complementaban entre sí en la región litoraleña requerían permanentemente de ajustes que paliaran las alteraciones

climáticas, políticas y sociales. Estos ajustes se practicaban en los intercambios comerciales mutuos mediante las tres monedas verdaderas que constantemente se registraban, la moneda metálica, las especies monetizadas y el circulante escriturario. Pero para Spooner (1972), sólo la moneda de cuenta, y por implicación los diferentes tipos de instrumentos de crédito, tenían la necesaria unidad y continuidad (homogeneidad), sin duda con motivo de su neutral relación con las otras tres monedas mencionadas. Pero por debajo de las oscilaciones, la moneda metálica restaba siendo la fuerza más estable.<sup>4684</sup> La velocidad de rotación del circulante variaba entonces según la naturaleza de la moneda. La moneda metálica tenía un recorrido y una duración diferente del de las especies monetizadas y del circulante escriturario.

En consecuencia, no todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas, como era el caso del tabaco en el Paraguay, o el azúcar en Tucumán, alcanzaban los mayores precios en puertos de salida como Buenos Aires.<sup>4685</sup> En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar tucumano, la cera y la coca salteña. Se vio en 1800

"...que por la escasa cosecha que ha habido en la Provincia del Paraguay de algodón y azúcar se ha vendido en la ciudad de la Asunción el lienzo a precio igual y aún mayor que el que se ha vendido en esta capital (Buenos Aires) sucediendo casi lo mismo con la azúcar blanca, y ya se ve que no sería buena conducta hacer venir aquí aquellos renglones cuando en un lugar más inmediato a los Pueblos tenía igual valor y menos gastos en la conducción".<sup>4686</sup>

Como consecuencia del alto precio de los paños, en tiempos en que privaba una escasez causada por las crisis del comercio exterior, los administradores de las comunidades indígenas del litoral rioplatense suministraban a los indios, cantidades de algodón en rama al fiado "...para el entretenimiento de las tareas [hilado y tejido] de las mujeres".<sup>4687</sup>

También era el caso en el Paraguay, del ganado mayor criado en Corrientes. En el juicio ejecutivo que se iniciara contra Joseph de Martín González en 1788, Miguel Rodríguez entró a beneficiar los efectos embargados

"...a cambio de toros, yeguas, caballos, y mulas, que es el tráfico general y negocio que se hace en el referido destino [Corrientes], con el objeto de pasar dichas especies a la Provincia del Paraguay donde vendidas producen más de un 200%".<sup>4688</sup>

Si bien era regular en Paraguay la tardanza y morosidad en los tratos, también era, según Eufrasio Boyzo --procurador apoderado del comerciante porteño Manuel Antonio Warnes, en su litigio con José Herze y Taboada acontecido en 1765--

"...constante la ganancia y utilidad que proporciona a los comerciantes, pues dan a los efectos que llevan desta ciudad [Corrientes], una estimación que pasa de un 200% y muchas veces 300%, sobre el principal de su compra, principalmente si los fian a los troperos y fabricantes de la yerba".<sup>4689</sup>

## **M-II Las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante.**

Con respecto a las cosas vendidas al fiado y en especie, por lo general costaban mucho más que las vendidas al contado.<sup>4690</sup> Esto ocurría por cuanto la competencia entre los varios tipos de moneda (moneda metálica, especies monetizadas y circulante escriturario) era algo usual; la abundancia o superabundancia de uno de ellos modificaba las estructuras de la actividad económica. El trueque no se vivía entonces como una forma de intercambio excepcional, sino normal, justificable por la penuria crónica de metálico. Pero las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante deben ser calculadas también ponderando tanto la relevancia de los términos crediticios (plazos y condiciones de pago) como la de las cesiones de crédito. La explotación a que se veían expuestos los productores Paraguayos mediante estos instrumentos crediticios le generaban al capital comercial ganancias extraordinarias que alcanzaban a más del 200%. Estas altas ganancias obedecían a que como hemos dicho las cosas vendidas al fiado valían mucho más que las vendidas al contado.<sup>4691</sup>

## **M-III Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero.**

Es sabido que el valor de los diversos tipos de moneda, pese a su equivalencia general, sufría de oscilaciones en su oferta y demanda y en su velocidad de rotación que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que, el lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos incidía en el valor del tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú por lo general era en moneda columnaria o doble, si en Chile en doblones de oro, si en Tucumán o Córdoba en moneda corriente o sencilla, y si en el Paraguay o Corrientes en especie monetizada (yerba, tabaco, algodón). Premios en la oferta de plata por oro, de moneda sencilla por moneda dura o doble, de especie monetizada por moneda metálica, y de circulante escriturario por especie monetizada y/o circulante metálico, oscilaban según el lugar elegido para la transacción.

En aquellas regiones donde se padecía de penuria de metálico (Corrientes y Paraguay), el pago en especie de los tributos fiscales que debían abonar los indios se hallaba fundado en una copiosa legislación colonial.<sup>4692</sup> En virtud de ella, cuando obligados a cancelar sus deudas, los indios, y por extensión los deudores en general, pagaban mediante un equivalente particular (especie monetizada o moneda de la tierra) que no era aceptado, la especie monetizada era evaluada por una junta de tasadores, elegida judicial o extra-judicialmente. Los precios fijados por dichos tasadores a la especie monetizada debían corresponder a las exigencias del mercado interno y representaban generalmente los precios oligopsónicos con que el capital comercial explotaba a las clases productivas. Como podemos observar, esta explotación era doble. Por un lado, fijaba los precios de venta de la mercadería importada y la tasa de interés por el riesgo y la mora. Por el otro, fijaba también los precios de los frutos de la tierra adquiridos en el interior.

## **M-IV Desvalorización de las especies monetizadas.**

Con la creciente penuria de metálico, provocada por la crisis minera del siglo XVII, la moneda metálica se valorizó y las especies monetizadas entraron a desvalorizarse. Originariamente, a la moneda de la tierra Felipe II le fijó por Real Cédula de Octubre de 1618 un valor en pesos huecos, equivalentes a seis reales de plata, diferenciándose en

consecuencia del acuñado en dos reales.<sup>4693</sup> Cada peso hueco, o seis reales de plata, se componía o bien de 6 1/4 libras [un cuarto de arroba] de algodón, o de 6 1/4 libras de tabaco, o de 12 1/1 libras [media arroba] de yerba.<sup>4694</sup> Cada arroba [25 libras] de tabaco y algodón estaba regulada entonces a cuatro pesos huecos, equivalentes a tres pesos corrientes de plata o 24 reales, y cada arroba de yerba estaba regulada a dos pesos huecos, equivalentes a 12 reales de plata.<sup>4695</sup>

## **M-V La paridad entre el peso hueco y el metálico.**

Para unos años más tarde, el de 1621, Garavaglia (1983) descubre que la moneda de la tierra se desvalorizaba aún más, alcanzando una paridad de uno a tres. Para un período aún más posterior, ocurrido en 1642, y con motivo de la crisis comercial provocada por la expulsión de los comerciantes portugueses de los puertos españoles de América, la paridad entre el peso hueco y el metálico se vuelve aún más desigual.<sup>4696</sup> Dicha expulsión obedeció a la rebelión de Portugal contra la dinastía Habsburga, la que había sido alimentada por las negativas consecuencias que venía ocasionando la Guerra de los Treinta Años. La variación de estimación del peso hueco en frutos del siglo XVII, a los de los frutos del siglo XVIII fue tan notable

"...que se ha reducido a una tercia parte de los seis reales de plata en que lo gradúa la ley, pues comúnmente no se aprecia en más que en dos reales,...e igual valor se le reputa en la Tesorería principal y en los juzgados de provincia".<sup>4697</sup>

De esta reducción del valor del peso hueco los principales afectados fueron la Real Hacienda y la Iglesia Católica. Como los deudores eran libres de satisfacer las costas judiciales, los derechos reales y los aranceles eclesiásticos en cualquier especie monetizada sin que pudiera obligárseles a pagar en las especies de mayor o mediana estimación

"...de aquí es que pagándose en las especies de ínfima estimación se causó a los jueces y escribanos...un perjuicio que alcanzó a las dos tercias partes de la cuota pues el peso no ha excedido del valor de dos reales de plata que es la tercia parte de los seis reales de la Ley".<sup>4698</sup>

Pagándose los aranceles y derechos incluso con gallinas también se obtenían jugosas diferencias. Puesto que los dos reales en que se tasaba una gallina, que era la cuarta parte de un peso hueco, componían medio real, al comprarse comúnmente las gallinas a un real de plata, deducían los deudores "...que pagando con ellas los derechos al respecto de dos reales el peso hueco lograrían la ventaja de un 100% menos de lo que realmente valen".<sup>4699</sup>

Pero cuando en Corrientes las cosechas de algodón fracasaban, los derechos reales y eclesiásticos y las deudas para con los comerciantes porteños debían ser pagados en yerba y tabaco procedente del Paraguay y las Misiones. Justamente, más de una docena de los grandes hacendados correntinos representaban en 1722 que si se les prohibía el llevar sus vacas a vender al Paraguay, por más que optaran por vender otros efectos "...no hallarían quien se los comprase por ser de mejor calidad y tenerlos de cosecha el Juez Eclesiástico".<sup>4700</sup> A más no poder se debían hacer valer entonces los Correntinos

"...de lo que produce su trabajo en recogidas y pasajes de ganado, este si no lo permuta y reduce a lienzo y otros efectos del Paraguay, ¿como podrá mantenerse con la decencia correspondiente a su estado, remitir las partes que tocan al Ilmo.

Obispo, mesa capitular, y Real Caja ni proveer la Iglesia de lo necesario para el Culto divino ni como adquirirán forma para con sus limosnas mantener las Religiones de San Francisco y Nuestra Señora de la Merced, ni los religiosos cobrar su pie de altar dellos si se les prohíbe el comerciar con sus haciendas?"<sup>4701</sup>

#### **M-VI Provisión de bastimentos a los estancieros.**

Los mercaderes se obligaban a suministrar a los estancieros y plantadores de algodón bastimentos, yerba, lienzo de algodón, herramientas y otros insumos.<sup>4702</sup> Eventualmente, tomaban a su cargo todo el pasivo de la actividad ganadera: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. Quienes en Corrientes, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener las estancias se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla U-I enumera una lista de 124 vecinos correntinos que a lo largo del siglo XVIII concurren a Buenos Aires para proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades productivas y practicar repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.<sup>4703</sup> Cruzando el listado de esta Tabla con el valioso Apéndice II que elaboró Maeder (1981), descubrimos que 45 de dichos vecinos comerciantes, o el 36%, fueron o se volvieron ganaderos, estancieros, criadores o hacendados. Algunos actuaron en la carrera mercantil luego de haber acumulado un capital en tierras y haciendas. Siete de los 45 comerciantes listados en la Tabla mencionada, o el 15%, se volvieron comerciantes de larga distancia después de haber operado con hacienda en pie.<sup>4704</sup> Una mayoría de los mismos, es decir 37 comerciantes sobre los 45 mencionados, o el 85%, adquirieron el status de hacendados luego de haber activado en el comercio. Sebastián de Casajús,<sup>4705</sup> quien contrajo en Buenos Aires entre 1744 y 1769 una decena de operaciones por valor de \$15.138,<sup>4706</sup> llegó a poseer extensas propiedades rurales en Saladas para la época de la Revolución de los Comuneros (1764). Justo García de Zúñiga,<sup>4707</sup> yerno de José de Acosta y López Lisperguer,<sup>4708</sup> quien contrajo entre 1770 y 1778 media docena de operaciones por valor de \$13.463, operó con hacienda en pie recién en 1777. Algunos otros comerciantes, se vincularon con la industria del transporte fluvial. Ignacio Belando, quien contrajo en 1773 y 1783 un par de operaciones por valor de \$3.021, devino luego propietario de barcos de la carrera del Paraná.

#### **M-VII La velocidad de rotación del circulante.**

Como entre las regiones que padecían penuria de metálico, como lo fueron Paraguay, Misiones y Corrientes, existieron diferencias estacionales en la producción de las especies monetizadas --alimentadas asimismo por factores extra-económicos tales como exceso de lluvias, sequías y plagas de langosta o gusano, y prohibiciones gubernamentales-- el intercambio entre las mismas y la velocidad de rotación de su circulante se vio también profundamente afectado.<sup>4709</sup> Es Garavaglia (1983) quien menciona, para el caso de regiones que sufrían una penuria crónica de metálico, que la velocidad de rotación del circulante sufría el impacto estacional propio de la producción misma de moneda de la tierra.<sup>4710</sup> La poca plata que entraba al Paraguay era inmediatamente canjeada por yerba o tabaco, vicios de los cuales nadie podía desprenderse y sobre los cuales recaía una demanda inelástica, al extremo de que antes de privarse de los mismos "...primero tolerarán sus habitantes la falta de pan, carne, y vestuario".<sup>4711</sup> Las diferencias en el intercambio entre regiones distintas obedecían al hecho de que las

regiones que vivían dedicadas a la elaboración de yerba, algodón y tabaco, como el Paraguay y las Misiones, carecían de vacas, cueros, miel de caña o azúcar, y las regiones que producían estos últimos productos, como Corrientes, solían estar escasos de yerba y tabaco.<sup>4712</sup> El Cabildo de Corrientes alegaba en 1722 que lo que Corrientes producía para la conservación de sus habitantes eran vacas, carretas, miel de caña, cueros de ante y maíz. Por el contrario, el Paraguay y las Misiones, excepto las vacas, cosechaba y fabricaba "...estos [mismos] efectos en tanta manera que ha llegado el caso de que estos vecinos [Paraguayos] excepto el maíz y cueros de ante compren de aquellos [Correntinos] todo lo demás", pero que sólo con las vacas los Correntinos podían conseguir la yerba y el tabaco.<sup>4713</sup>

De no fracasar la cosecha de algodón, cuando en Asunción estaba la vara de lienzo --como en 1716-- a un peso, en Corrientes se vendía a cuatro reales, "...por cuia razón no se trae [del Paraguay] sino la yerba".<sup>4714</sup> Y por el contrario, fracasando las cosechas, por las epidemias y fatalidad de los tiempos, el Paraguay se surtía de algodón desde Corrientes "...que se ha vendido a cinco y siete pesos arroba, cuando antes su precio fijo hera, el de un peso o doce reales quando mucho".<sup>4715</sup> De aquí que cuanto hacendado había en Corrientes en el siglo XVIII participaba de las arrias colectivas de ganado al Paraguay, de las cuales ni siquiera la Iglesia secular estaba exenta. El Cura Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fue al Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo todo a yerba

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas se reduce a cuatro reales".<sup>4716</sup>

También el Maestro Ignacio Ruiloba, Cura y Vicario de Corrientes, fue denunciado en 1736 por numerosos testigos de haber "...echo distintas vaquerías y embiádoles al Paraguay a venderlas por yerba y que las porciones que della a remitido proceden de ésta", sin el consiguiente pago de sisas y alcabalas.<sup>4717</sup> Tan frecuentes fueron estas vaquerías y arreos, que en 1750 el Gobernador José de Andonaegui se vio precisado a prohibir la saca de ganado de Corrientes.<sup>4718</sup> Maeder (1981) atribuye la penuria de ganado en Corrientes no sólo a las ventas al Paraguay, sino también a las sequías y depredaciones de los indios del Chaco, y de los indios Charrúas y Guaraníes fugitivos de las Misiones.<sup>4719</sup> Pero no siempre resultaba más rentable a Corrientes vender vacas.

### **M-VIII Diferencias estacionales entre regiones.**

En tiempos en que en Paraguay fracasaba la cosecha de algodón, por epidemias o la fatalidad de los tiempos, como fue el caso del año 1803, los paraguayos se surtían del algodón de Corrientes, cuyo precio se llegó a quintuplicar, vendiéndose a \$5 y hasta \$7 cada arroba, con lo que a los correntinos les resultaba en dichas coyunturas mucho más rentable vender algodón que vacas.<sup>4720</sup>

Asimismo, existieron diferencias estacionales entre las regiones que producían yerba y las que producían tabaco, que afectaban también su mutuo intercambio. Las regiones dedicadas a la elaboración de yerba solían carecer de tabaco, y viceversa. En un litigio ocurrido en Asunción en 1789, un testigo interrogado certifica que el tabaco colorado traído en la piragua de José Coene y el cosechado en la estancia de Juan José Gonsález

"...lo han permutado los capataces por la especie de yerba, dando cada arroba de tabaco por ocho de yerba, siendo lo corriente dar una de tabaco por cuatro de yerba, o a lo sumo, 5 arrobas y 8 libras".<sup>4721</sup>

Uno de los capataces implicado responde más adelante, que ha vendido de 14 a 15 arrobas de tabaco por yerba, al precio de 7, 8, 10, y 12 pesos huecos la arroba de tabaco, donde el tabaco vendido a \$8,5 correspondía a 8 libras de yerba, y el vendido a \$10,6 correspondía a 18 libras de yerba, "...valiendo cada una de ellas 12 reales huecos, que se reputan por 3 reales de plata".<sup>4722</sup> También existieron diferencias entre regiones tabacaleras propiamente dichas. Las zonas dedicadas a la elaboración de tabaco de pito, de escasa aptitud para conservarse en el tiempo, como lo era la región de Villa Rica, carecían de tabaco de hoja, de mayor capacidad para dicho propósito, ubicadas en los alrededores de Asunción, y viceversa.<sup>4723</sup> El tabaco de pito carecía de aptitud para conservarse por falta de goma "...pues la misma humedad, que se necesita para el enmanejo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase produce aquel temperamento de calidad conservable".<sup>4724</sup> Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, al componerse de las primeras hojas que produce la planta en su mayor vigor, al atraerse "...toda la escasa goma que produce aquel territorio es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista".<sup>4725</sup>

## **M-IX La introducción de moneda metálica.**

Las desigualdades regionales se vieron alteradas con la introducción de moneda metálica. Este proceso de monetización tuvo principio, a juzgar por el texto de la Visita de 1802, con la residencia de las Partidas de la Expedición para la Demarcación de los Límites con Portugal, ocurrida en la década de 1750 (repetida en 1790),<sup>4726</sup> incrementándose luego con el establecimiento de la Factoría de Tabacos, verificado en 1779, y con la fundación de los Fuertes de Frontera (Villa Real de Concepción), y de las fábricas de cables y amarras.<sup>4727</sup> Aparentemente, el proceso de monetización metálica se vio reforzado con ciertas medidas limitacionistas en el cultivo de tabaco. Por providencia del Virrey Marqués de Loreto, la siembra y cosecha anual de tabaco colorado se limitó a la suma máxima de 9000 arrobas.<sup>4728</sup> En efecto, Martín José de Aramburu y Juan José González, Contadores de las Reales Cajas, manifiestan en Asunción en 1793 que no estaba en su ánimo obligar a los contribuyentes a que paguen los derechos en plata pues

"...sería gravosa en un país como éste en que casi al mismo tiempo de introducirse el uso de la moneda se han escaseado los medios de su adquisición con la supresión del tabaco negro, y limitación del colorado por lo que nos parece justo quedase al arbitrio de los contribuyentes el pagarlos en plata o en frutos del país según su justa estimación actual".<sup>4729</sup>

## **M-X El almacenamiento de las especies monetizadas.**

Pero no solo la producción de las especies monetizadas (tabaco, algodón, azúcar, lienzo) sufría de oscilaciones que afectaban su intercambio y velocidad de rotación, sino que también su almacenamiento provocaba las consiguientes mermas. Si bien las especies monetizadas, al igual que las monedas metálicas, eran homogéneamente divisibles o fraccionables, las primeras carecían de las virtudes de la durabilidad y alto peso específico. En efecto, diferentes especies que se envasan y almacenan por más de un año tienen de

merma porcentajes distintos. El tabaco tiene de merma el tercio por ciento, el algodón el ocho por ciento, el azúcar el quince por ciento, y el lienzo de algodón cuatro varas por ciento si es doblado, y cinco varas por ciento si es sencillo. La evaporación o merma de tabaco difiere también según la calidad del mismo. En un mismo mes, semana, o día puede haber diferencias en la merma de dos libras de tabaco,

"...pues no transpira lo mismo el tabaco malo, y desecado, que el húmedo y resinoso, y así se ve cada año muy diferente merma, por que ésta depende del más o menos tiempo que habrá tenido de almacén, de la maior o menor calor del año, de la maior o menor humedad del aire, proveniente de las más o menos aguas del año, cuías circunstancias son sumamente varias en esta ciudad".<sup>4730</sup>

Igualmente si se ponen a prueba dos libras de tabaco, uno húmedo y resinoso, y otro malo y resecado "...habría en un mismo mes, o día notable diferencia de merma entre los dos, porque también depende la evaporación de la constitución actual y habitual de cada cuerpo".<sup>4731</sup>

La yerba ensacada y pesada en los percheles o en los almacenes del pueblo, al poco tiempo de haberse conducido, es también motivo para la variación de peso. Aunque en un principio hubiera sido disecada con la mayor delicadeza, siempre conserva la yerba alguna humedad,

"...que es la que le mantiene la virtud y el espíritu que la continuación del tiempo le disipa, quedando en este caso desvirtuada, sin sustancia y con menos peso del que tuvo cuando estuvo en su fuerza".<sup>4732</sup>

Cobrándose la yerba en la playa y recogiendo dentro de la casa que la cobra

"...tiene seis por ciento de merma, y estando dentro de la casa que la tiene recibida un año o seis meses a lo menos por ensacar tiene de mermas otros cinco por ciento de cesto y hoja".<sup>4733</sup>

Para ensacar la yerba, el cuero del saco se remojaba, conservándose su humedad mucho tiempo, por lo cual si con ella se romaneaba es evidente que pesaba más que después de haberse secado. Los sacos de yerba sufrían además en su peso la estacionalidad misma del propio cuero, por ser de una materia porosa, el cual acrecienta o disminuye su peso según la humedad o sequedad reinante, "...atribuyéndose a este motivo el aumento de peso, y otras veces mermas, que se nota en la yerba que se recibe en estos almacenes".<sup>4734</sup> Finalmente, la variación de peso de los sacos de yerba puede ser atribuida a las mismas romanas,

"...porque lo gastado de los ejes con el uso, el inconsiderado manejo del pilón arrastrándolo por la balanza y perdiendo su asiento, algún golpe, y otras causas quedan para el desarreglo de estas piezas,...y careciendo los pueblos de Misiones de inteligentes [maestros de herreros] que reparen estos defectos, no extraño que se adviertan variaciones en los pesos de mas o de menos".<sup>4735</sup>

## **M-XI La monetización de los frutos de la tierra.**

La monetización de los frutos de la tierra se lograba no sólo mediante la imposición realenga de un precio de monopolio al tabaco o a la yerba, sino también mediante el control de su calidad. Cuando a fines del siglo XVIII fue introducido por el mercader Tomás Antonio Romero en el mercado porteño el gusto del tabaco negro torcido del Brasil, desplazando del consumo al tabaco negro del Paraguay, las autoridades del Estanco se vieron en la necesidad de idear un método fraudulento para dar salida al acopio de tabaco Paraguayo.<sup>4736</sup> En efecto, cuando las existencias de tabaco Paraguayo sobreabundaban, para que su salida se lograra en forma rápida y lucrativa se proyectó sigilosamente su mezcla con el tabaco del Brasil en la proporción de tres partes por una a favor de este último.<sup>4737</sup> Para proporcionar entonces salida al tabaco negro del Paraguay camuflado con el del Brasil se alzó el precio de este último de \$25 la arroba a \$37 1/2

"...con el doble objeto de que el aficionado se retrajese en algún modo de comprarle y prefiriese a beneficio de la mayor comodidad los cigarrillos, en cuyo consumo recogía la Renta a más de la ventaja de la elaboración la utilidad de reducir a dinero un genero inútil por sí sólo".<sup>4738</sup>

En conclusión, así como hemos evaluado la importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos también hemos analizado los efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado,<sup>4739</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>4740</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada "desarreglo de los campos", que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un proceso revolucionario.

## Capítulo II-F-16

### **Crisis agraria colonial y Real Renta de Tabaco**

#### Índice

- N-I Tradición historiográfica en materia de crisis agraria
- N-II Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco.
- N-III Contratos de habilitación.
- N-IV Licencias para beneficiar yerba.
- N-V Real Renta de Tabaco.
- N-VI Cosecheros en la siembra de tabaco.
- N-VII Márgenes de ganancia.
- N-VIII Cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera.
- N-IX Exenciones al servicio de Milicia.
- N-X Marinería de los barcos.
- N-XI Matriculados en la Real Renta de Tabaco.
- N-XII Beneficio de la yerba mate.
- N-XIII Alto endeudamiento y escasez de inversiones.

## **Introducción del capítulo II-F-16**

Para nosotros, la crisis revolucionaria se habría debido no sólo a la baja rentabilidad de los yerbatales Paraguayos vis a vis los Misioneros, sino fundamentalmente al negativo impacto que tuvo para la región: a) la permanente designación --por parte de los Gobernadores-Intendentes y los Virreyes-- de Tenientes Gobernadores de origen porteño o peninsular;<sup>4741</sup> b) la escasez de inversiones en capital fijo social (fortines);<sup>4742</sup> y c) la persistencia de un proteccionismo mercantilista, que mediante auxilios y subsidios para el beneficio de yerbales y la producción de tabaco, favorecía a una oligarquía cosechera, agremiada y corrompida --instalada en Asunción--, perjudicando a los campesinos de giro más reducido, y a las regiones agrarias periféricas. A medida que la crisis agraria se fue acentuando, las contradicciones que se dieron en el seno de la propia elite se agravaron. Las contradicciones por la renta agraria que se dieron al interior de dicha elite se reflejaron primero en la lucha por las exenciones de la Milicia y por integrar la Matrícula de Cosecheros, más luego por las repercusiones de las malas cosechas de yerba y tabaco, y más luego en las licencias para beneficiar yerba en los yerbatales silvestres del norte.

En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar la producción y circulación de tabaco, y al nocivo impacto que el Gremio de Cosecheros tuvo en la estructura política y en la diversificación económica del área agrícola. Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de una burguesía habría que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los cosecheros a elevar la producción debida a la Real Renta de Tabaco y Naipes; y la oposición de la Milicia a aumentar el cupo de cosecheros exentos del servicio. Para estudiar estas luchas hemos recogido media docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>4743</sup>

### **N-I Tradición historiográfica en materia de crisis agraria**

En la historiografía de las crisis agrarias, y específicamente en lo referente a la crisis revolucionaria del Paraguay, dicha crisis giró en la esfera de lo político. Autores como Lynch (1967), asignaron a la rivalidad entre el Gobernador Lázaro de Rivera,<sup>4744</sup> y el Virrey Marqués de Avilés --en torno a las excepciones al servicio militar de los cosecheros del tabaco-- un anticipo del futuro separatismo del Paraguay.<sup>4745</sup> Otros autores, como Cardozo (1958), Picón-Salas (1963) y Arciniegas (1967), intentaron remontar dicha motivación al fenómeno de la rebelión de los Comuneros, de comienzos del siglo XVIII. En tanto, Garavaglia (1987), sin hacer eje en la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX, sostuvo que la militarización del campesinado es lo que posibilitó la expansión de su frontera agrícola, y conllevó también una violencia y rebelión casi crónicas, que emparentaba sus rebeliones con las llamadas guerras campesinas.<sup>4746</sup>

Sin embargo, pese al proceso de campesinización, y a diferencia de otras burguesías agrarias, como la de Antioquia en Colombia,<sup>4747</sup> la burguesía agraria Paraguaya fue incapaz de consumir un proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación económica. La reducción de las causas del boom yerbatero a la sobreexplotación del trabajo campesino, padecería entonces de una mono-causalidad ajena a la realidad experimentada por el agro Paraguayo. Autores como Saeger (1972, 1981), basado en Funes (1816-17) y Estrada (1899) --que niega la vinculación de la Rebelión de los Comuneros (1721-35) con el Iluminismo, y sólo le asigna intereses anti-jesuiticos--<sup>4748</sup>

intentaron remontar la motivación de la crisis revolucionaria al proceso de abolición de las encomiendas, que a fines del siglo XVIII --por obra del Gobernador Agustín Fernando de Pinedo--<sup>4749</sup> sufrieran los miembros de la elite Asunceña; y a la presión de una naciente burguesía mercantil de origen peninsular, que fue enseñoreándose paulatinamente del Cabildo Asunceño.<sup>4750</sup> Para autores más recientes, como Cooney (1992), el secreto de esta crisis está en el manejo porteño de la Real Renta de Tabaco y Naipes.

## **N-II Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco.**

Casi siempre las mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, con el consiguiente aumento de la rentabilidad agraria, afectaban el beneficio neto del cosechero. Al no tener seguridad de recuperar con la cosecha, el capital empleado y los intereses adeudados, el cosechero por lo general no acometía mejoras técnicas. Como era norma entonces entre los cosecheros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar los plantíos. La exigüidad del beneficio obtenido por los cosecheros de tabaco sería el motivo fundamental por el cual se redujeron a trabajar solamente el tabaco de hoja. Asimismo, esta exigüidad explicaría porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital agrícola, frenando el desarrollo económico de las regiones tabacaleras. Los cosecheros no sentían estímulos en mejorar los métodos de elaboración del tabaco, ni en introducir otros nuevos, tal como el tabaco torcido negro,<sup>4751</sup> pues costaban mucho dinero implementarlos, por el mayor ingrediente de mano de obra.<sup>4752</sup> Teniendo en cuenta que los cosecheros eran renuentes a invertir fue entonces preciso también extenderles a través de la Real Renta de Tabaco y Naipes líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener corriente los plantíos o chacras.

## **N-III Contratos de habilitación.**

Bloqueada entonces la capitalización agrícola autónoma, sólo cabía la capitalización dependiente. En los contratos de habilitación, antes que la Renta del Tabaco se fundara, los mercaderes se obligaban a suministrar a los beneficiadores de yerba y a los cosecheros de tabaco bastimentos, carne, mulas, lienzo de algodón, herramientas, medicinas y otros insumos.<sup>4753</sup> Eventualmente, tomaban a su cargo todo el pasivo de la actividad agrícola: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. El cargo o debe de las cuentas corrientes de los cosecheros era cubierto enviando a los mercaderes remesas de tabaco, conforme un precio de los insumos suministrados previamente acordado, pero que los mercaderes solían subir. La duración de estos contratos de habilitación dependía de la calidad del tabaco producido y del crecimiento de la deuda del cosechero. Frente al precio recargado de los suministros y a la tasa de interés usurario aplicada al crédito que se les abría, los cosecheros terminaban por declararse insolventes. Si el plantío o chacra producía un rendimiento normal, la deuda del cosechero crecía geométricamente, y en igual proporción la ganancia de los mercaderes.

Quienes en Paraguay, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires y avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los obrajes y los plantíos de yerba, tabaco y algodón se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla T-I enumera una lista de vecinos paraguayos que a lo largo del siglo XVIII concurren a Buenos Aires a proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades extractivas y productivas y

practicar repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.<sup>4754</sup> Entre ellos se destacaron los Caballero Bazán, los León y Zárate, los Penayos, Cañetes, Larios Galván, Paniagua, Zugasti, Coene, etc. Juan Miguel de Zugasti, propietario de una hacienda en el Campo Grande contrae en Buenos Aires entre 1753 y 1765 doce operaciones de crédito por valor de \$25.248, entre las cuales se destacan la que concertó en 1753 con Francisco Antonio de Escalada por valor de \$7.000 y la que entabló en 1765 con Manuel Antonio Warnes por valor de \$3.000.<sup>4755</sup> El Sargento Mayor Sebastián de León y Zárate,<sup>4756</sup> propietario de estancias y yerbatales en el pago de Tapúa, contrae en Buenos Aires en 1755 siete operaciones de crédito por valor de \$27.233, entre las cuales: la que concierta con Carlos de los Santos Valente alcanza a los \$4.300, y la que concierta con Manuel de Escalada alcanza los \$7.600.<sup>4757</sup> Según el Gobernador del Paraguay Marcos José de Larrazábal,<sup>4758</sup> en un oficio dirigido al Virrey del Perú en septiembre de 1747, el Alcalde de Primer Voto Don Sebastián de León y Zárate, era "el hombre más rico del país,...el gamonal Padre de la Pobretería".<sup>4759</sup> El Sargento Mayor José Cañete,<sup>4760</sup> regidor en 1769, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo contrae en Buenos Aires en 1766 ocho operaciones por valor de \$28.069, de las cuales dos son celebradas con Francisco Conget Cordobés por más de \$15.000.<sup>4761</sup> El Sargento Mayor Fernando Larios Galván,<sup>4762</sup> regidor en 1769, propietario de estancias para ganado mayor así como de yerbatales en el Río Tobatí y el Río Salado contrae en Buenos Aires entre 1761 y 1775 tres operaciones de crédito por valor de \$3.050, siendo la más relevante cuantitativamente hablando la que celebra con Pedro José Quiroga.<sup>4763</sup> García Rodríguez Francia,<sup>4764</sup> un portugués especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco torcido negro así como del Pueblo de Indios de Yaguarón,<sup>4765</sup> contrae en Buenos Aires entre 1760 y 1781 once operaciones de crédito por valor de \$16.610, de las cuales dos son concertadas con Nicolás Pombo de Otero en 1765 y 1769 por cerca de \$5.000, y tres con Manuel Antonio Warnes en 1760 y 1769 por valor de \$4.700.<sup>4766</sup> También operaron numerosos comerciantes que ocuparon cargos concejiles, como Pedro Nolasco Domecq y Melchor Marín en 1787,<sup>4767</sup> y el Alcalde de primer voto Tomás Ortega Fernández, el Alguacil Mayor José Estéban de Arza, y el Procurador Síndico Juan Francisco Decoud en 1799.<sup>4768</sup>

#### **N-IV Licencias para beneficiar yerba.**

Como gran parte de las partidas de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios, los Gobernadores en sus Visitas fomentaban las licencias para beneficiar yerba en los yerbatales silvestres del norte, con el objeto que los indios pudieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías.<sup>4769</sup> En 1797, el Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago,<sup>4770</sup> licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos [San Cosme, Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fé y San Ignacio Guazú] de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real".<sup>4771</sup> El objeto de este último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,<sup>4772</sup> era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita".<sup>4773</sup>

Pero los cosecheros Paraguayos que ni podían costear los gastos de transporte hasta Buenos Aires, ni sufrir las dilaciones que eran indispensables hasta conseguir lo que necesitaban, se veían precisados a concurrir a Asunción, y recibir allí la ley de los vendedores en los precios, en los plazos, y en las demás condiciones con que se celebraban los contratos. En el caso del tabaco del Paraguay, como en el del vino de Cuyo, al sufrir la

competencia externa, sus precios en Buenos Aires no producían beneficio alguno, salvo pérdidas. Cualquier cosechero Paraguayo que condujera tabaco por su cuenta a Buenos Aires debía, según nos relata Arias Divito (1976), devengar de 2 a 3 reales cada arroba por costos de conducción,<sup>4774</sup> 6 reales de derechos en Santa Fé (Puerto Preciso), los costos de desembarco y almacenaje, la remisión en carretas desde 100 leguas de distancia, el 4% de alcabala, otro tanto de comisión, el 20% de mermas, y las cuentas del apoderado, para finalmente venderse cada arroba por sólo 3 1/2 o 4 pesos.<sup>4775</sup> La competencia del tabaco torcido negro brasileiro, introducido ilegalmente, por padecer de menores costos de elaboración y transporte, al estar fabricado por mano de obra esclava, desplazaba del negocio al tabaco negro paraguayo, fabricado sólo en pueblos de indios.<sup>4776</sup> De ahí también, las altas tasas de ganancia que debía arrojar este tráfico ilegal. Si por una arroba de tabaco torcido negro que rinde 75 varas y se compra en el Brasil a 4, 6 u 8 pesos la vara, una vez introducida en Buenos Aires alcanzaba a 47, 56, 75, 112 y 150 pesos, podemos decir que salvando los costos la tasa de ganancia llegaba al mil por ciento.<sup>4777</sup> Pero, si consideramos las razones estructurales detrás del cálculo de dicha tasa, ésta última se incrementaría, pues mientras los cueros producidos en el litoral Rioplatense por peones pagados con tabaco brasileño, era contabilizado a los precios más altos del tabaco en Buenos Aires, los brasileiros compraban los cueros con el tabaco producido por ellos mismos y contabilizado a los precios más bajos vigentes en Brasil.

#### **N-V Real Renta de Tabaco.**

Mas una vez fundada en 1779 la Real Renta de Tabaco, nadie salvo la Renta quedó autorizada a comercializar dicho producto río abajo de Asunción.<sup>4778</sup> Esta Renta llegó a contar en tiempos de la recolonización borbónica con casi más poder que el resto de la administración colonial.<sup>4779</sup> Sus Administradores eran más poderosos que los mismos Alcaldes ordinarios, y los tercenistas y estanquilleros contaban con más poder que los mismos Alcaldes pedáneos, lo cual confirmaría lo aseverado por Pereyra (1924) y Palacio (1954) en sus célebres polémicas con la historiografía liberal. En efecto, sobre los Cabildos seculares e incluso sobre las Comandancias de Armas operaban la prepotencia y los privilegios de los Administradores de las Rentas de Tabaco y Naipes.<sup>4780</sup> En la jurisdicción del Río de la Plata llegaron a existir una docena de administraciones generales, setenta administraciones particulares y cuatro centenares de tercenos y estancos de tabaco.<sup>4781</sup> Es sabido también que la Renta de Tabaco actuó como un amortiguador de las fluctuaciones provocadas por la desigualdad de los ingresos procedentes del gravámen a la producción de plata (diezmo) y de la venta monopólica del mercurio.<sup>4782</sup> El aumento del circulante monetario, provocado por la Renta de Tabaco, al pagar el tabaco a los cosecheros exclusivamente en moneda metálica, generó a su vez una creciente pérdida del poder adquisitivo del dinero metálico y una consiguiente alza del costo de vida.<sup>4783</sup> La devaluación del dinero metálico y la correlativa alza de los precios significó una profunda erosión de la base material de la élite patricia Paraguaya, la cual recibía de sus encomiendas de indios y de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas.

#### **N-VI Cosecheros en la siembra del tabaco.**

En el Paraguay, el Administrador de la Renta del Tabaco verificaba un enorme número de contratos con individuos productores llamados cosecheros. Los cosecheros acordaban mediante contrato la entrega a la Factoría de una cantidad de tabaco a un precio fijo, realizando la entrega al momento de la cosecha. En un principio, la Renta se propuso

recibir un tope de cuarenta mil arrobas por año sin límite alguno por cabeza empadronada. Los cosecheros introducían en la factoría de Asunción, al igual que lo hacían en las factorías de Salta y Cochabamba, según lo reconocían el Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,<sup>4784</sup> y el Ayudante Mayor Veterano Miguel Antonio de Herrero,<sup>4785</sup> crecidas porciones de tabaco "...valiéndose no pocas veces de algunas mediaciones para lograr la preferencia".<sup>4786</sup> En ese tiempo no se empleaban en la Renta tantos individuos "...porque cada Propietario por su propio interés se esfuerza al cultivo".<sup>4787</sup> En la contrata que en 1804 celebró el Rey con el Paraguay, el Gobernador Lázaro de Rivera --profundamente enemistado con el Virrey Marqués de Avilés-- sostenía que en aquel entonces (entre 1779 y 1789) se "...aseguraba todas las cosechas, [pues] todos vendían su tabaco en la Factoría, ninguno estaba exento (sic) del servicio Militar y no se conocía ningún Privilegio".<sup>4788</sup>

Pero con motivo de una baja en los precios del mercado Europeo y un exceso de stock en las barracas de Buenos Aires, el Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto limitó, en Febrero de 1789, los envíos del Paraguay a un máximo de ocho mil arrobas. Para concretar dicho tope montó una Matrícula de cosecheros que formalizarían contratos con la Real Renta comprometiéndose a entregar un máximo de 25 arrobas por cabeza, y exceptuando a los mismos del servicio militar en la frontera con Portugal.<sup>4789</sup> Las partes en el contrato acordaban entregar en la Factoría, previo dicho empadronamiento, una cantidad de tabaco a un precio fijo, impuesto por la misma Factoría, en un momento específico del futuro.<sup>4790</sup> Posteriormente este límite se vió desbordado por un creciente aumento de la demanda.

## **N-VII Márgenes de ganancia.**

El margen de ganancia de la Factoría era enorme, pues según Cardozo (1959), el tabaco en rama era adquirido a los agricultores paraguayos a un precio de 12 reales o \$1 1/2, y vendido por los funcionarios del Estanco a \$12 1/2, un precio ocho veces superior.<sup>4791</sup> A cambio de este beneficio y en virtud de ser el trabajo del tabaco de más difícil cultivo, cosecha y preparación que el de la yerba, el estado colonial se obligaba a adelantar dinero metálico e insumos, y excepciones al servicio militar en la frontera con el Imperio Portugués.<sup>4792</sup> Al igual que con el tabaco, en 1788 primero y en 1797 después, un determinado grupo de cabildantes de origen peninsular, intentó infructuosamente estancar también la yerba, para con sus utilidades y so pretexto de librar al vecindario del servicio militar montar una tropa reglada de 400 hombres.<sup>4793</sup>

Este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las oscilaciones del precio del tabaco, lo que le daba a la Factoría la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los cambios de precio. Según Cerda y Herrero, para las cuarenta mil arrobas de tabaco que la Renta se había propuesto recibir cada año, debían "...matricularse 1.600 hombres al respecto de 25 arrobas cada uno, y por consiguiente para veinte mil [arrobas] deben considerarse 800 cabezas".<sup>4794</sup> Siendo que la cosecha y acopio de tabaco ascendió en 1803, un año malo, a sólo 17.000 arrobas, "...ya podrá Usía inferir que muchos de los [893 empadronados en el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería de Costa Abajo] no han cumplido sus contratas".<sup>4795</sup> Sin contar que en dicha cifra de 17.000 arrobas se encontraban "...las que han entregado los que no son matriculados,...y [las que han] introducido los Pueblos y comunidades de Indios", vendría a deducirse "...que más de la mitad de los Matriculados no han cumplido en este año sus

contratas".<sup>4796</sup> A partir de estos cálculos, Cerda y Herrero concluían que siendo las estaciones buenas "...tendrá la Renta sobrantes de tabaco como lo ha tenido en los años anteriores, sin necesidad de tales contratas", y siendo adversas "...ninguna precaución bastará para redimirla de las vicisitudes del tiempo".<sup>4797</sup> Las 17.000 arrobas recolectadas, a 25 por cada individuo, "...únicamente deben haber ocupado [a] 608 [individuos]", por consiguiente 285 matriculados "...han estado ociosos defraudando a la Provincia el servicio [militar] que debían prestar como verdaderos ciudadanos, y lo que es mas, recargando el peso que debían sobrellevar entre los más indigentes y necesitados".<sup>4798</sup>

Lo cierto era, que siendo excesivo el número de los contratantes en los Regimientos de Costa Arriba y Costa Abajo, "...más de una mitad han faltado al concierto, atento a que apenas se ha surtido la Renta de 17.000 arrobas".<sup>4799</sup> Aunque pudiera decirse que entre todos han completado dicho número por medio de pequeñas partidas "...siempre queda en pié la dificultad, y venimos a deducir que los estipulantes han consignado menos de la mitad de las 25 arrobas que debe dar cada uno".<sup>4800</sup> En conclusión, en años prósperos, la Renta tendrá "...abundantes porciones de tabaco en que escoger, sin necesidad de contratas".<sup>4801</sup> Y en años estériles y calamitosos, por mas que la Renta aumente o multiplique la lista de los Matriculados "...no ha de poder resarcir ni completar la cantidad de los consumos".<sup>4802</sup> El Coronel Pedro Gracia Lacoizqueta y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra presagiaban en 1803 que con la escasez futura de tabaco, por haberse dedicado con preferencia a la caña, al maíz y al algodón, la Renta se verá precisada, a diferencia de los años de abundancia en que escogía el tabaco a su elección, "...a tomar todo el que se le presente aunque sea de mala calidad para que no grite el público".<sup>4803</sup>

Los proyectos de la Renta de Tabaco salieron errados, a juicio de Cerda y Herrero, por hacer creer a la Superioridad que en el Paraguay "...había sobra de Pobladores para todo".<sup>4804</sup> Si bien era cierto que existía una sobrepoblación relativa, comprobada recientemente por Maeder (1975),<sup>4805</sup> también es preciso considerar que este aumento provenía en muchos casos

"...de la multitud de indios unidos en Pueblos y otros que andan dispersos, de la muchedumbre de mujeres, cuyo número es más crecido, de los esclavos muchachos, impedidos, y otros que por su edad son ineptos para todo servicio".<sup>4806</sup>

La prueba está que en la denominada "guerra de las naranjas" (1802), en ocasión de apoderarse los Portugueses de los llamados Cinco Pueblos

"...fué preciso cubrir las guardias y Destacamentos con Pardos libres, y que no alcanzando para todos los Puestos de una y otra costa, con anuencia del Factor que se allanó a ello, se echase mano de los Matriculados [en el Gremio de los Cosecheros de Tabaco]".<sup>4807</sup>

## **N-VIII Cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera.**

Para que la Provincia del Paraguay estuviere regular y moderadamente poblada, Lázaro de Rivera calculaba que debía contener 800 almas por legua cuadrada.<sup>4808</sup> Multiplicada esta última cantidad por las 3.200 leguas cuadradas que poseía la provincia habitada,<sup>4809</sup> daban una hipotética población de 2.560.000 individuos. A la Provincia del

Paraguay, concluía Rivera, "...que está excesivamente poblada según la aritmética política del Señor Marqués [Avilés]..., le faltan [restando sus actuales 80.000 almas] nada menos que 2.480.000 almas".<sup>4810</sup> Conviniendo con las 80.000 almas que daba el Marqués de Loreto como población de la Provincia, réstense pedía Rivera los "...30.000 indios de ambos sexos que no hacen ningún servicio militar, y 12.000 esclavos, mulatos y negros libres que están en el mismo caso, nos quedarán 38.000 españoles y mestizos".<sup>4811</sup> Si a estos últimos sustraemos 19.000 mujeres quedan otros tantos hombres. Si a estos 19.000 varones "...se quitan como es forzoso los muchachos desde la cuna hasta 16 años; los que pasan de 45, los empleados en el estado Eclesiástico, en el Gobierno, en los Negocios Civiles, los enfermos, los estropeados, en suma todos los que no pueden servir",<sup>4812</sup> Rivera convenía que las 80.000 almas del Sr. Marqués vendrían a quedar en "...poco más de 5.000 hombres capaces de llevar las armas".<sup>4813</sup> Pero estos 5.000 hombres "...han de comer, han de alimentar a sus familias, y han de ocurrir a la agricultura, a la industria, a la navegación, y al comercio".<sup>4814</sup> Si para las 17.456 arrobas de tabaco cosechadas en 1803 necesitó la Renta emplear a 1.683 hombres, cuanto requerirá, se preguntaba Rivera, para las 40.000 arrobas que necesita para cubrir la demanda de tabaco en la población. Haciendo el correspondiente cálculo de la regla de tres simple, Rivera concluía que necesitaría de 3.856 hombres. De no hacer los cálculos de esa manera, "...siguiendo las falsas y débiles especulaciones que se han adoptado se verá la Renta en la terrible dificultad de no poder abastecer al Público ni contener el Contrabando".<sup>4815</sup>

En la Real Renta estaban matriculados como cosecheros, a juicio de Cerda y Herrero, los más pudientes y acomodados, y en el servicio de Milicias habían quedado "...únicamente los más pobres que no tienen como atender a las fatigas del Real Servicio, por falta de caballos".<sup>4816</sup> Poco importaba que en los fuertes y cuarteles se hubieran completado las plazas "...si las más de las veces no han de poder ocurrir cumplidamente a los sitios señalados, y que cuando lo verifiquen ha de ser sin armas por no haberlas en la Provincia ni como comprarlas no costeándolas Su Majestad".<sup>4817</sup>

## **N-IX Exenciones al servicio de Milicia.**

El peso que las exenciones al servicio de Milicia tuvieron en los diferentes partidos o jurisdicciones fué fuertemente desigual.<sup>4818</sup> En los Presidios de Remolinos, Herradura y Reducción de San Francisco Solano debían ser de dotación 20 milicianos con un oficial, sargento y cabo, aumentándose en la última Reducción 6 pardos libres, cuyos Destacamentos eran los más penosos que tenía el Regimiento de Costa Grande. En el Presidio de la Herradura el servicio duraba un mes, y la ida y regreso ocupaban quince días y tal vez más, "...por que van desde la distancia de 30 y 25 leguas".<sup>4819</sup> Para el Presidio de Remolinos (ubicado en el actual Departamento del Chaco) se sacaba la gente de las doce compañías de que se componía antes el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería de Costa Abajo "...con la penalidad de tener que nadar los dos ríos llamados Piray y Suruby, que en tiempos de lluvias son rápidos y sobremanera incómodos".<sup>4820</sup> La Costa se ponía tan pantanosa e intransitable que era por demás toda ponderación. Estas marchas las emprendían los soldados "...a su propia costa en uno u dos caballos, viéndose muchas veces en la precisión de hir mendiagando por el camino, y andándolo muchas veces a pié".<sup>4821</sup> El Destacamento de la Herradura era aún más penoso. La gente de la cual se proveía dicho Destacamento

"...sale de los Partidos de Quiquío, Quindé y Acaay [actual Departamento de Paraguari], tienen que pasar el Río Negro que cuando se derrama crece sobre

media legua los arroyos llamados Cambuchi, el Espinillo, el Inguerí, Iné, el Peguachó, y sobre todos el Estero Bellaco que tendrá ocho cuerdas de latitud, y una legua de Bañado Panatanoso".<sup>4822</sup>

En unos Partidos y compañías se había recargado más que en otros el número de los Matriculados como cosecheros en la Real Renta de Tabaco. Por ejemplo, en dos de los vecindarios más poblados, "...apenas hemos encontrado 19 personas que alistar en el de Carapeguá, y 36 en el de Acaay [actualmente ubicados en el Departamento de Paraguari]".<sup>4823</sup> En los Valles de Itauguá y Guayavité (en el actual Departamento Central), sólo se hallaron 32 soldados. De manera tal que no se hubiese podido completar el Regimiento sin acudir a los Partidos de la Recoleta, Lambaré, Tembetary, Campo Grande, San Antonio, Tayamapé, Barcequillo, un Canto de las Salinas, Ibitiminí y Villa de Neembucú.<sup>4824</sup> En palabras del Gobernador Lázaro de Rivera, era imposible encarar la Defensa

"...sin tropezar con el gravísimo inconveniente de obligar a los pocos que no están exentos [del servicio] a una continua fatiga, o a sacarlos de otros Partidos distantes, sufriendo el intolerable trabajo de caminar 20 o 30 leguas para defender mal un territorio de donde no son vecinos, o por decirlo mejor, para defender a los Matriculados".<sup>4825</sup>

De los seis partidos de Quiquío, Quindy, Acaay, Carapeguá, y Espartillar, que antes componían seis compañías, "...ha sido preciso formar tres".<sup>4826</sup> En la noroeste Población de Villa Real de la Concepción, el servicio duraba un trimestre, "...repartiéndose proporcionalmente la carga, con las demás Milicias de la Campaña". También tenía la precisión "...de correr la caravana del Río en canoas, hasta la Herradura en vaje Mar, y con especialidad en Plenilunios para embarazar el paso a los Indios infieles".<sup>4827</sup> En la Costa, desde la estancia del Rey hasta la caída del Tibiquarí, que hacen treinta leguas, sólo se han encontrado 71 soldados. Debido a que toda la región se componía de estancias, y dichos soldados se hallaban

"...en continua fatiga recorriendo la costa, conduciendo Mitas desde la Estancia del Rey para la Reducción de los Mocobies, custodiando y escoltando a los Tobas y demás naciones...no se ha agravado a sus habitantes con Guardias y Destacamentos".<sup>4828</sup>

"¿Que diría la Renta, se preguntaban Cerda y Herrero, si hubiera palpado prácticamente este desengaño?".<sup>4829</sup> Si lo hubiera previsto, Cerda y Herrero concluían que

"...no se atrevería entonces [el Virrey Marqués de Avilés] a sostener que en esta Provincia había un excesivo número de habitantes capaces de tomar las Armas [sin goce de sueldo] con desahago en todo lance por ascender su Población al número de ochenta mil almas".<sup>4830</sup>

Salvando todas estas dificultades, iban los Milicianos a estos Destacamentos, mientras que los Matriculados, concluían Cerda y Herrero, "...se hallan en la comodidad de sus casas sin fatiga alguna con sus haciendas y heredades defendidas por la vigilancia de unos pocos a quienes la suerte hizo infelices".<sup>4831</sup>

## **N-X     Marinería de los barcos.**

En cuanto a la marinería de los barcos, esta se surtía de todos estos Partidos, en especial de los de Tapúa y Costa Abajo, y no era posible "...negarles las Licencias porque en estos conchabos tienen vinculada su subsistencia y la de sus familias".<sup>4832</sup> Aunque los permisos se limitan a cuatro o seis meses "...ellos se toman un año, dos y tres, y muchos se quedan en las provincias de abajo, porque siendo los Paraguayos robustos y aptos para todo trabajo, son buscados con preferencia".<sup>4833</sup> Para no dar lugar a que las licencias se las tomaran los pobladores en forma inconsulta y que insensiblemente el Paraguay se despoblara, fué preciso no cortarles la libertad de procurar su subsistencia, otorgándoles las respectivas Licencias sin cortapisas. Desde que se reagravó la carga militar con el excesivo registro de tantos Matriculados,

"...son varios los que han emigrado oprimidos del trabajo, buscando su descanso en otros territorios, siendo consiguiente a todo esto el atraso del comercio, y el abandono de la agricultura como se ha experimentado en la escasez de frutos a que está reducida la Provincia por la poca o ninguna libertad de la gente para dedicarse a las Labranzas que han abandonado en el tiempo más preciso para ocurrir a los Destacamentos".<sup>4834</sup>

Al no ser posible retacear las Licencias "...cada día se va aumentando el número de embarcaciones, piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número de marineros". De estos, muchos se establecen en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y diestros en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".<sup>4835</sup>

#### **N-XI Matriculados en la Real Renta de Tabaco.**

Siendo los Matriculados en la Real Renta de Tabaco los más pudientes, Pedro Gracia y Juan de la Cuadra concluían que "...se están riendo al ver que tantos infelices están sufriendo el pesado yugo del servicio militar".<sup>4836</sup> Sólo tratan de pasar el tiempo sin hacer beneficio alguno a la Renta

"...a quien dan el tabaco peor guardando o vendiendo lo mejor entre los Particulares que lo pagan a otro tanto del aforo que tiene en la Renta, reservándolo aquellos más pudientes para el tiempo de la escasez en que vale el mazo de tres para cinco reales".<sup>4837</sup>

Como en el régimen de contratas que organizaba la Renta del Tabaco no se estipulaba pena alguna, Lázaro de Rivera sostenía en 1804, que "...queda el Matriculado libre, y sin responsabilidad, gozando tranquilamente sus privilegios, cumpla o no con la contrata".<sup>4838</sup> De aquí se sigue que los Matriculados, en un año de mala cosecha "...aumentan los tormentos de la Renta, porque venden ocultamente el tabaco bueno a un precio superior a el que le han de pagar en la Factoría".<sup>4839</sup> Los pobres que no podían cultivar hasta las 25 arrobas que eran necesarias para ser registrado como contratante o cosechero "...venden sus cortas porciones a el que dá mas, porque ya no están obligados como antes a llevar su tabaco a la Factoría, ni se les puede apremiar como yo lo hice en la escasez del año de 1798".<sup>4840</sup>

#### **N-XII Beneficio de la yerba mate.**

En cuanto a la yerba mate, los únicos que conocían el beneficio y laboreo de la misma eran los naturales y moradores de la Cordillera, por cuya razón, aseguraban el Coronel Pedro Gracia Lacoizqueta y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra, "...jamás se les puso reparo para la salida de peones a los yerbales".<sup>4841</sup> A los que sí se les puso reparo fue a los moradores de los Cinco Pueblos de las Misiones. Estos últimos, eran mitados por los Gobernadores, bajo licencia especial otorgada a los Subdelegados de los distintos Departamentos.<sup>4842</sup> Pero lo que más perjudicaba el servicio de Milicia era la circunstancia de que los beneficiadores "...anticipan a los Peones el conchavo de dos o tres años para tenerlos seguros con usura y sin ella en el precio de los efectos que les dán".<sup>4843</sup> Siendo forzoso que los peones se mantuvieran en los yerbales todo ese tiempo o más, quedaban "...ausentes de sus casas y familias, sin poder venir desde tantas distancias a sus respectivos turnos, recayendo por consiguiente las fatigas que debían hacer sobre otros pobres".<sup>4844</sup>

### **N-XIII Alto endeudamiento y escasez de inversiones.**

Para concluir, la crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos fiscales y las levadas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;<sup>4845</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>4846</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario.

#### **Capítulo II-F-17      ¡Error! Marcador no definido.**

Crisis pecuaria colonial y origen de un régimen predatorio o  
"desarreglo de los campos"

17

#### **Índice**

- Ñ-I      Economías de enclave.
- Ñ-II     Factores de movilización de energía campesina.
- Ñ-III    Dueños de barracas o barraqueros.
- Ñ-IV    Estacionalidad de las vaquerías.
- Ñ-V     Mercado del cuero.
- Ñ-VI    Mercado a término del cuero.
- Ñ-VII   Costos de comercialización.
- Ñ-VIII   Mercado de trabajo rural.

- Ñ-IX. Diferenciación salarial.
- Ñ-X Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava.
- Ñ-XI Medias lunas o desjarretadoras.
- Ñ-XII El caballo.
- Ñ-XIII Provisiones de las vaquerías.
- Ñ-XIV Corambre de hacienda alzada.
- Ñ-XV Mano de obra a destajo.
- Ñ-XVI Reglamentación de la marca y la contramarca.

## **Introducción del capítulo II-F-17** ¡Error! Marcador no definido.

En la historiografía de las crisis socio-económicas de la Banda Oriental primero y del Uruguay después, la de la crisis pecuaria propiamente dicha o simplemente depredación pecuaria o matanza indiscriminada de hacienda cimarrona, conocida bajo el apelativo de "desarreglo de los campos", giró tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos tales como la demanda internacional de cueros y el doble sometimiento del capital agrario al capital comercial, sufrido desde las sub-metrópolis mercantiles del Brasil y el Río de la Plata.<sup>4847</sup>

Pero el error de estas tesis acerca del medio rural colonial uruguayo ha sido no tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos y la Banda Oriental) en su conjunto.<sup>4848</sup> Ella estaba constituida por economías agrícolas de plantación (pueblos de Misiones) en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción de cueros para la exportación (Vaquerías del Mar o de la Costa). Los pueblos de Misiones aseguraban, parafraseando a Assadourian, el proceso de reproducción de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en las vaquerías.<sup>4849</sup>

### **Ñ-I Las economías de enclave.**

Las economías de enclave, como fue el caso de las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental en el siglo XVIII, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, cuando la campaña de la Banda Oriental se hallaba cuasi-desierta, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a las rinconadas del Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y la Banda Oriental.<sup>4850</sup>

### **Ñ-II Factores de movilización de energía campesina.**

Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, el factor más activo de movilización de energía campesina hacia la producción mercantil (corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y Administradores.<sup>4851</sup> Revelando el rol de estos

funcionarios reales, Juan Bautista Dargain pide en 1792 licencia para vaquear en la otra banda bajo la excepcional condición de

"...que en estas faenas he de emplear para peones...a los indios del Pueblo de Yapeyú que con permiso de su Corregidor Cabildo y Administrador se me presentasen a conchavo a los cuales he de pagar en igual forma que a los peones Españoles que conchabase para el mismo efecto".<sup>4852</sup>

También fueron factores activos de la movilización campesina los oficiales a cargo de guarniciones militares, los cuales aprovechaban a la soldadesca ociosa. En la Guardia del Paso del Rey (Banda Oriental) Andrés Fernández, natural de la Villa Rica y vecino del Camacué, mayor de 30 años, de oficio labrador, que lo prendió la gente de la partida de Don Antonio Pereira más allá del Fraile Muerto, dijo en 1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en aquellos dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, constándole asimismo que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales, como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Álvarez con su gente".<sup>4853</sup>

### **Ñ-III Los dueños de barracas o barraqueros.**

En un comienzo los comerciantes exportadores eran asimismo dueños de barracas. Pero más luego, estas funciones fueron diferenciándose. Los dueños de barracas o barraqueros eran los que estaban vinculados con los acopiadores del interior.<sup>4854</sup> El acopiador de pieles o cueros, un empresario no encomendero, se veía obligado a lidiar en un negocio donde no se invertía en tierras ni se poblaban estancias y donde prevalecía, aunque en forma primitiva, un embrionario mercado de precios futuros, y un mercado estacional de mano de obra rural donde lo que se remuneraba era un trabajo a destajo o por piezas, y donde a su vez prevalecía una incipiente división del trabajo. La exigüidad del beneficio obtenido por los acopiadores dotados de las vaquerías menos ricas explicaría el porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital de los acopiadores, frenando el desarrollo económico de las regiones ganaderas. Los cuadros X-I, X-II y X-III nos revelan la nómina de deudores que operaron en la Banda Oriental con créditos otorgados por acreedores residentes en Buenos Aires. El acopiador de cueros no sentía estímulo alguno por poblar estancias, ni en introducir métodos nuevos de producción ganadera. Poblar estancias e implementar métodos nuevos no contaba con crédito mercantil alguno pues implicaba ingentes riesgos. Casi siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el aumento del precio de la tierra --tan pronto aumentaba la rentabilidad ganadera-- pero no de los beneficios netos, por lo que el estanciero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar el capital empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los acopiadores de cueros, dada la abundancia de ganados mostrencos, no invertir en tierras, tampoco contemplaban reservas para amortizar el equipo de trabajo (carretas, tropillas de caballos, desjarretadoras). Por cuanto los acopiadores eran renuentes a invertir, los comerciantes dueños de barracas tuvieron que extenderles líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener activas las vaquerías.

### **Ñ-IV La estacionalidad de las vaquerías.**

La estacionalidad de la vaquería o corambre estaba garantizada por la presencia de los cardos, los gusanos y las pariciones. Las matanzas se practicaban, al igual que los rodeos para marcar la hacienda, en los meses de mayo, junio y julio, cuando los campos estaban libres de cardos y no había riesgo en maltratar terneros recién nacidos por estar estos meses fuera del tiempo de la parición.<sup>4855</sup> En los meses de verano no se podía herrar por la corrupción o riesgo de agusanarse "...que le entra a los animales por el calor del yerro". Tampoco en esta estación se podía vaquear, o apartar ganado para el pago del diezmo de cuatropea por la abundancia de cardales, y además por ser tiempo de cría o de parición en que cualquier movimiento del ganado ponía en peligro de muerte a las crías, las que debido a su endeblez física, no estaban en condiciones de seguir a sus madres en las disparadas provocadas por los vaqueros. Los únicos que no respetaban esta restricción estacional (faenar sólo en invierno) y vaqueaban en verano eran los que faenaban cueros clandestinamente, ya que poco les importaba que en las disparadas de la hacienda se murieran los terneros recién paridos. Pero no sólo los faeneros clandestinos faltaban el respeto a la naturaleza. También los indios se comportaban inescrupulosamente. En la petición de licencia para vaquear que hiciera en 1792 Juan Bautista Dargain, este expresaba que

"...se impedirá el destrozo del ganado hembraje, que sin consideración hacen los faeneros changadores con el fin de aprovecharse del cebo y grasa, particularmente los indios que no habiendo quien lo impida matan las bacas preñadas sólo con el fin de comer el ternero a que son apasionadísimos",

en lugar de matar los toros crecidos "...que no sirven para otra cosa que para consumir los pastos, y aún impedir los procreos".<sup>4856</sup> Las arreadas de ganado hechas por los Administradores de las Temporalidades en el Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y la Banda Oriental lo fueron "...sin reservar ybierno o berano pues cuanto llega una tropa con ganado cojido, sale otra tropa a hacer otra cojida, lo que no han dejado de hacer muchos años há".<sup>4857</sup> El resultado de estos tremendos abusos fue lo que se denominó "el desarreglo de los campos" con la consiguiente despoblación de los mismos y la siembra de la semilla de la anarquía, que estalló a comienzos del siglo XIX con el denominado Artiguismo y más luego en el oriente correntino con el Cacerismo.<sup>4858</sup>

## **Ñ-V El mercado del cuero.**

En lo que hace a la naturaleza del mercado del cuero, los precios se fijaban generalmente por adelantado mediante operaciones de crédito notarialmente escrituradas. Tanto la fijación de los precios como la cláusula de exclusividad durante el término del plazo contraído en los créditos de compra o habilitaciones, confería a las relaciones sociales y económicas en la producción de cueros, una naturaleza oligopsónica.<sup>4859</sup> De esta forma, la especulación creaba, parafraseando a Hilferding (1910), un precio para cada pesada del cuero y para cada momento del año, al extremo de convertirse en un mercado a término que le daba al acopiador "...la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los cambios de precio".<sup>4860</sup>

Para la determinación del precio de los cueros existían en la segunda mitad del siglo XVIII dos tipos de mercados, el de contado o de ajuste rápido y el mercado de futuros o a término, o de ajuste lento. En el primero, las partes acordaban la entrega de una

cantidad de cueros a un precio, realizando la entrega en forma inmediata o efectiva. En el segundo, las partes acordaban entregar o recibir una cantidad de cueros en un momento específico del futuro.<sup>4861</sup>

## **Ñ-VI El mercado a término del cuero.**

Las primeras experiencias de mercado a término en la producción pecuaria se habían observado ya en el siglo XVII. Gonsález (1957) relata cómo se comienza a comercializar el cuero a entrega futura, es decir, antes de la corambre, colocando la producción a los dueños de los navíos de registro. Esto es aceptado por los capitanes de los barcos puesto que se aseguraban la puntualidad de la entrega y el conocimiento del costo de sus insumos.

Los precios de futuro tendían a ser más elevados que los de contado debido a gastos extras en intereses y almacenamiento. Por ejemplo, si bien los cueros de 25 y 40 libras tomados en marzo de 1772 para dentro de 6 y 12 meses de plazo costaban a razón de 4 y 11 reales, aquellos tomados un mes antes para dentro de 10 y 21 meses costaban a razón de 6 y 15 reales respectivamente.<sup>4862</sup> El premio o diferencia entre el precio actual en efectivo y el precio de los futuros, obedecía a oscilaciones en: 1) la oferta y la demanda del cuero; 2) la provisión de carretas y lanchones; y 3) la oferta y demanda de bodega marítima. En el ejemplo mencionado, la prima o premio entre ambas contrataciones alcanzaba a dos reales por 4 y 10 meses de diferencia que había entre una y otra compra a término. Al acercarse la fecha término, ambos precios se iban igualando por cuanto los costos de almacenamiento y la tasa de interés iban perdiendo importancia. Si los precios de los meses más lejanos se cotizaban más alto que los cercanos, se podría decir que existía un mercado normal, por reflejar éste los costos de almacenamiento e interés. En cambio, si ocurría lo contrario, se podría decir que existía un "mercado invertido". Esto ocurría sólo en casos de fuerte presión de la demanda en el corto plazo.

Observando detenidamente la Tabla X-I, descubrimos que a diferencia del estancamiento sostenido por Romano (1963), se produce a mediados del siglo XVIII un sostenido aumento del precio del cuero, partiendo en 1745 de un precio de 15 reales para el cuero de toro y 12 reales para el de novillo (ambos de 3 varas de longitud por 2 varas de ancho), hasta alcanzar en 1753 los de 20 y 16 reales respectivamente, o el 33 por ciento de aumento. Estos precios tienen la virtud de mantenerse hasta la entrada de España en la Guerra de los Siete Años a fines de 1761, fecha en que sufren una caída vertiginosa.

Con la Paz de París declarada en 1763 el precio del cuero experimenta un "boom" que supera los precios alcanzados en la preguerra. Efectivamente, de acuerdo a la Tabla X-II, el cuero de toro de 40 libras, equivalente al que mide 3 varas por 2 varas, alcanzaba el precio de 23 reales, mientras que el de 30 libras, equivalente al de novillo de 3 por 2 varas, alcanzaba el precio de 20 reales. Estos precios, a medida que la intensa demanda de postguerra se fue cubriendo, en lugar de mantener su nivel sufren un progresivo descenso, hasta tocar en 1769 el piso más bajo, con 9 reales el cuero de 40 libras y 3 1/4 reales el cuero de 25 libras, es decir, una baja del orden del 61 y 86 por ciento respectivamente. Al año siguiente, en 1770, el precio del cuero sube, a 5 1/2 reales el de 25 libras y 14 reales el de 40 libras, es decir, un alza con relación al año precedente del orden del 50 por ciento. A partir de dicho año y hasta la participación de España en la Guerra contra Inglaterra o de la Independencia de Estados Unidos en 1779, el precio del cuero se mantuvo estancado debido aparentemente a la intervención del mercado de futuros. Con la participación de

España en la guerra de la Independencia de Estados Unidos, el precio del cuero cayó a ocho reales el de mayor calidad. Finalmente, durante las guerras Napoleónicas, debido al permiso real de comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales, su valor se mantuvo en los doce reales por unidad.<sup>4863</sup>

En el precio de exportación del cuero debían computarse los costos de transacción incurridos por los acopiadores, pues los fletes terrestres y fluviales (un real o el 12 por ciento en concepto de flete para aquellos cueros transportados en lancha desde Buenos Aires hasta Montevideo) incluían aquellos gastos necesarios para poder acondicionar los cueros en los puertos de salida. Cada carretero que transportaba los cueros hasta los puertos de cabotaje debía llevar guías del número de cueros que condujere cada carreta, precaviendo de ese modo que se extrajese ilegalmente ningún cuero por el camino de tránsito. Más aún, a fines de siglo se estableció por bando que las guías debían llevar consignadas las marcas de los cueros respectivos. En el caso de los cueros puestos en Montevideo, el acopiador debía pagar: 1) el flete mencionado, 2) el derecho del Ramo Municipal de Guerra (dos reales), el cual suponía un 25 por ciento del valor del cuero, aforado a un peso cada unidad (que no se cobró en Montevideo hasta 1779), y 3) el Ramo de Alcabala (un 4 por ciento).<sup>4864</sup> Juntas, las tres partidas mencionadas constituían un 41 1/2 por ciento del valor del cuero a su salida en América. En el caso de los cueros remitidos desde Buenos Aires a Montevideo, era preciso que antes de embarcarlos en las lanchas del río se reconociera si estaban de recibo y se practicara además su pesaje y romaneaje. Para esta tarea se requería que al menos hubiesen pasado tres días desde la última lluvia de modo que los cueros presentaran menos del 10 por ciento de humedad.<sup>4865</sup> Por cueros a estilo de embarque se entendía aquellos de 40, 50 y hasta 70 libras, pues nunca "...se ha tenido por cuero comerciable los de becerro, respecto a ser chicos, y no tener peso regular".<sup>4866</sup>

## **Ñ-VII Costos de comercialización.**

Si a su vez, estos cueros querían ser exportados a España, el comerciante exportador y no ya el acopiador, debía pagar los gastos por: 1) el arrumaje y acomodo de los cueros hecho por los estibadores en la bodega de los barcos; 2) el flete Río de la Plata-Cádiz; 3) el derecho de entrada en España; 4) la comisión; y 5) el seguro.<sup>4867</sup> Teniendo en cuenta que:

- a) el flete del cuero del Río de la Plata a Cádiz oscilaba entre 4 reales plata por pesada de 35 libras en tiempos de paz, que corresponde al 50 por ciento del valor del cuero a su salida en América aforado a un peso (8 reales) cada cuero, y 24 reales plata en tiempos de guerra;
- b) el derecho de entrada en España alcanzaba a 2 1/5 reales por pesada de 35 libras (4 maravedíes de vellón por libra, o 140 maravedíes, o 4 reales y 4 maravedíes de vellón por pesada de 35 libras), que corresponde a algo más del 25 por ciento aforado a peso cada cuero;
- c) la comisión respectiva se estilaba en el 4 por ciento sobre su precio en el puerto de salida (16 reales plata) o 3/4 de real por cada unidad, o el 9 por ciento;
- y d) el seguro alcanzaba al 3 1/2 por ciento sobre un aforo de 18 reales provinciales o 14 1/2 reales plata, igual a 1/2 real de plata o 6 1/4 por ciento, siempre con referencia a la

unidad; concluimos que los gastos de comercialización (derechos de entrada más comisión y seguro) de un cuero de 35 libras que costó en el mercado a término 12 reales plata, alcanzaba promedio entre 8 reales plata o el 90 por ciento en tiempos de paz y 27 reales plata en tiempos de guerra.<sup>4868</sup>

Asimismo, si se quería reexportar dicha mercancía a reinos extranjeros se debía pagar: a) el derecho de salida de España a razón de 9 reales de vellón por cuero, o el 15 por ciento sobre el avalúo de 60 reales de vellón por cuero; y b) el flete de Cádiz al puerto extranjero, que sumado a los derechos de entrada, comisión y seguro alcanzaba al 97 por ciento del valor del cuero. Sumando al costo del cuero sus gastos de comercialización, que oscilaban entre 13 y 37 reales plata, y considerando que el precio del mismo en España fluctuaba alrededor de los 30 reales plata debemos concluir que la exportación legal de frutos del país sólo era lucrativa en tiempos de paz.<sup>4869</sup>

Por cierto, considerando estos altos costos de comercialización, sólo en tiempos de guerra, mediante faenas clandestinas o exportando ilegalmente a los reinos extranjeros (Brasil), es decir, con operaciones donde se salvaban todos los gravámenes fiscales, podía alcanzarse una tasa de ganancia razonable. En un documento de época se aclara que los cueros extraídos por los Portugueses y fraudulentamente conducidos hasta Río de Janeiro, y de ahí a Lisboa, pagaban el 4 por ciento por un derecho que llamaban de baldeación, y luego el quinto por el derecho de los géneros que se embarcaban, que correspondía al 20 por ciento,

"...con que importando las dos partidas 24% es visto que los extranjeros ahorran por aquella vía [fraudulenta], un 15 o 16%, y que el Real Erario y los ramos particulares se privan de un 39 o 40% que se dejan de contribuir por prohibir tan estrechamente estas faenas".<sup>4870</sup>

## **Ñ-VIII El mercado de trabajo rural.**

Como consecuencia directa de la vigencia de un mercado a término para la fijación del precio del cuero, los empresarios de vaquerías o corambres se vieron obligados a maximizar la rentabilidad de sus empresas satelizando el mercado de trabajo rural, dividiendo la fuerza de trabajo a su cargo según las diversas tareas que las comprendían, y pagándolas a destajo. Para los representantes de concepciones dualistas, como Prado Junior (1961), el trabajo a destajo, era una relación capitalista disfrazada o encubierta, pues los aparceros, vaqueros en nuestro caso, no pasarían de ser meros asalariados que recibían salarios de manera indirecta, normalizando (standardizando) la producción directa per cápita. Sin embargo, para Dos Santos (1972), un representante de la tendencia estructuralista, la aparcería sería visualizada no como una relación capitalista disfrazada sino como una relación de producción precapitalista y semi-servil; la cual por apoyarse en una división del trabajo entre productores familiares que producían para el autoconsumo, y no expropiaban al trabajador el fruto total de su trabajo, no generaba plusvalía. Por ello, para Dos Santos (1972), la producción capitalista sólo surge con la gestación de plusvalía y con la existencia del trabajador libre, esto es, el trabajador que vende su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción, percibiendo un salario por el alquiler de la misma.<sup>4871</sup> Para el caso Colombiano, Kalmanovitz (1983) sostiene que las nuevas aparcerías que surgieron en la Nueva Granada "...podían utilizar parcialmente trabajo asalariado", lo que aproximaba al aparcero "...a la figura del burgués agrario al contratar

trabajo asalariado libre y abonar una renta al terrateniente".<sup>4872</sup> El trabajo a destajo y la aparcería o mediería en el nivel de la producción rural se habría desarrollado entonces como alternativa más extendida para maximizar beneficios y minimizar riesgos. En la opinión de Brown y Salvatore (1987, 1989) la irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar la mano de obra rural en la Banda Oriental durante el siglo XVIII obedecía no sólo a la resistencia de los trabajadores precapitalistas (gauchos) a desprenderse de los medios de subsistencia, sino también a la resistencia cultural a cambiar el estilo de vida, los hábitos de trabajo, y la conciencia de la noción del tiempo y de la naturaleza del ocio.

Si bien diversos autores reconocen que en la mayor parte de los casos los acopiadores o contratistas que implementaban el trabajo a destajo eran empresarios no encomenderos, sólo los dependentistas se atreverían a aseverar que estos últimos fueran capitalistas. De igual manera, en lo que hace a la calificación del salario, si bien es indudable que la relación social que prevalecía en la producción de bienes exportables (cueros) era el trabajo a destajo, sólo los dependentistas se animarían a asegurar que la naturaleza de ésta relación social fuera la de un salario capitalista. A diferencia de lo que sostienen Sala, Rodríguez y de la Torre (1967), creo que hay una distinción sustancial entre la condición del peón contratado para una corambre y la del peón de estancia; pues si bien el tipo de remuneración era similar (en dinero o en especie), lo que se remuneraba era notoriamente distinto. Mientras que a un puestero de estancia se lo contrataba en forma permanente y se le pagaba un salario por tiempo (un promedio de \$8 por mes), a un peón changador se lo contrataba transitoriamente y se le pagaba, según la propia Sala de Tourón reconoce, un salario o jornal por pieza faenada; con el cual, como veremos, a veces doblaba el sueldo mensual de un peón y podía llegar a doblar el sueldo mensual de un capataz de estancia; quien nunca ganaba más de doce pesos mensuales.<sup>4873</sup>

La naturaleza de enclave de las vaquerías también especializaba el mercado de trabajo rural. Tan era así que la fuerza de trabajo de una vaquería se componía esencialmente de: a) baqueanos, b) desjarretadores, c) caballerizos, d) desolladores, e) barraqueros, f) bomberos, y g) achuradoras. El personaje central en esta empresa era indudablemente el vaquero. Este era un hombre libre, por lo general mestizo, de origen rural, cuya función principal consistía en desjarretar o faenar el vacuno. Por vaquería se daba un promedio de dos o tres vaqueros, acompañados por un sólo peón caballerizo, que degollaba al animal una vez desjarretado, y entre tres y diez peones que lo desollaban.<sup>4874</sup> La retribución de cada una de dichas tareas variaba por cuanto el tiempo y la habilidad requeridas para desempeñar cada una eran también distintas.

## **Ñ-IX La diferenciación salarial.**

La desigual inversión en tiempo y habilidad para cada tarea hacía necesario entonces una primitiva diferenciación salarial; aquellas tareas más riesgosas y que requerían de mayor vaquía (calificación) como la del vaquero que desjarretaba y acodillaba el animal, debían ser mejor pagadas que las de menor riesgo, como por ejemplo la del peón que sólo cuereaba al vacuno y estaqueaba y marcaba al cuero, o la del barraquero que simplemente recogía, desgarraba, limpiaba, clasificaba, apilaba, y prensaba los cueros.<sup>4875</sup> Si bien aparentemente el vaquero recibía por unidad de cuero producida menor jornal (1/2 real por cuero) que el peón o el barraquero, quienes cobraban entre un real y medio y dos reales por cuero construido o fabricado, en la totalidad de la jornada el vaquero doblaba o triplicaba los ingresos del peón. Los sueldos de los peones barraqueros se pagaban unas

veces por plata y otras en papeletas que los acopiadores les daban por el tiempo de sus servicios expresando en ellas lo que habían invertido, a razón de cuanto por mes o por cuero, y qué número de cueros habían tenido a su cargo.<sup>4876</sup> Por ejemplo, en la estancia "La Calera" cada peón desollador recaudaba entre 8 y 18 pesos por mes, mientras que el vaquero Martín Cuello, el que menos toros había desjarretado, recaudó \$19 y 3 reales, y Tomás Díaz, quien había alcanzado el record, recaudó \$33 y 3 reales por mes.<sup>4877</sup>

La diferencia entre peón y vaquero obedecía al hecho de que la cantidad de animales que cada vaquero desjarretaba en una jornada de labor, doblaba o triplicaba la cantidad de animales que un peón caballerizo podía alcanzar a degollar, cuerear y apilar en el mismo tiempo. Como promedio cada vaquero desjarretó en 1769 en la estancia mencionada de los Jesuitas Expulsos, entre 200 y 600 toros por mes. El record fue alcanzado por el vaquero Tomás Díaz quien desjarretó 1069 toros en tres meses, seguido por Pascual Moroti con 894 toros, y por quien menos cueros hizo, el vaquero Martín Cuello con 620 toros, todos en igual período.<sup>4878</sup>

Como a los peones se les pagaba por cuero, ya fuese de toro o novillo, y chico o grande, es muy probable que los vaqueros prefirieran reducir sus riesgos y acelerar la faena aprovechando los días o semanas de buen tiempo, desjarretando aquellos vacunos que les ofrecían menor resistencia y esfuerzo; en otras palabras, la velocidad de la faena dependía de la consistencia del suelo y de la edad y gordura de los vacunos. Es sabido que lluvias excesivas provocaban tal humedad en el suelo que impedían que los vaqueros maniobraran con soltura sus cabalgaduras. Por otro lado, el ganado joven y gordo, le exigía al vaquero mayor velocidad y destreza.

#### **Ñ-X Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava.**

Asimismo, la naturaleza de enclave de las vaquerías satelizaba el mercado de mano de obra rural. En efecto, los acopiadores preferían aminorar sus costos, haciendo recaer el peso del trabajo en núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, conchabando en forma colectiva partidas de indios Guaraníes, Tapes o Minuanes, o cuando el acopiador era un militar, recurriendo al auxilio de milicianos y oficiales en lugar de changadores mestizos a los que había que pagar con jornales individuales.<sup>4879</sup> Así por ejemplo, en 1730 el Capitán Luis de Sosa Mascareñas, Alcalde de la Santa Hermandad, declaró ante el Cabildo de Montevideo que las ranchadas de los changadores atraían hacia ellos a muchos de los indios reducidos en Santo Domingo Soriano, con sus mujeres e hijos, para peones de a pié y cocineras y lavanderas; y al no faltar los cielitos (bailes) y los beberajes, "...empezaban las mujeres a descomponerse con los troperos".<sup>4880</sup> En dichas ranchadas o puestos, como el de la Rinconada de Martínez de Haedo, donde regían la institución de la poliandria y un peculiar código moral llamado Instrumentos de Haedo, sólo se castigaban dos delitos "...que son el que se lleva una china por la falta que hace a otros, y el matar un buey porque hace falta para acarrerar los cueros que se hacen en los campos".<sup>4881</sup> Por el primer delito de "llevarse chinas", el Juez Subdelegado Gabriel de la Quintana manifestaba en 1784, que el Administrador General de las Misiones Gregorio Soto "...ha llegado los casos de hacer castigar con azotes, y cortar el pelo [a] algunos españoles hijos de hombres honrados".<sup>4882</sup> Hubo según Quintana, pobre "...que por no sufrir tal afrenta después de atado a sacado un cuchillo de su bota, y se ha despansado y muerto".<sup>4883</sup>

Se sabe también cómo las vaquerías o corambres, donde se retribuía con un jornal a destajo, contribuyeron en gran medida a la disolución de las escasas reducciones indígenas

existentes aún en el siglo XVIII. Ya a comienzo de siglo, el Procurador General llamaba la atención del Cabildo de Buenos Aires sobre una estancia poblada por Portugueses; y declaraba que los mismos por ser inhábiles para vaquear se valían de los indios Minuanes y de los peones de Santa Fé, llegando incluso a valerse de peones Tucumanos.<sup>4884</sup> Al entregarse a la matanza de ganados para servir a los intereses mercantiles de los acopiadores de cueros y obtener en retribución toda suerte de abalorios, los indios de las Misiones Jesuíticas

"...no atendieron ya sus telares, siembras, y otros trabajos establecidos y todo lo que antes se llevaba y gobernaba, por unas muy escrupulosas reglas, se redujo a confusión y trastorno y aún se acreditó, que en los años de 1768 y 1769 no enviaron efectos algunos para el pago de tributos y demás indispensables gastos, sino once pueblos, y estos en muy corta cantidad".<sup>4885</sup>

En el caso de las vaquerías y recogidas de ganado alzado de la banda occidental del Río de la Plata estas se frustraban cuando existían rumores de malones indígenas o escasez de caballos; y en esos casos se extraía siempre el ganado de las estancias, aunque sus dueños se quejaban de que contaban con escaso ganado y que era flaco el poco que tenían. La extracción la practicaban los matanzeros o compradores de reses formando cinco partidas para cada uno de los cinco partidos (jurisdicciones) de la campaña; comenzando con el pago más próximo (La Matanza), y a medida que los pagos más cercanos eran trajinados, le seguían los demás pagos más lejanos, de modo que una vez abastecida la ciudad con reses del primer pago, "...días antes que se experimentase el clamor del pueblo estuviese proveída con las del segundo pago, y así hasta el último".<sup>4886</sup>

## **Ñ-XI Las medias lunas o desjarretadoras.**

Por otro lado, la relación que mantenía el personal de las vaquerías o corambres con los medios de producción era desigual, por cuanto cada uno de ellos poseía con intensidad diversa algún medio de producción. En las corambres o faenas de hacer pieles, los vaqueros eran provistos por el empresario acopiador con medias lunas para desjarretar los animales, con cañas tacuaras para calzar las medias lunas, y con espadines para acodillarlos, pero no de los caballos, que eran de su propiedad. Las cañas tacuaras en que se engarzaban las medias lunas eran producidas en Corrientes, donde la Mayordomía de la Iglesia Catedral se encargaba de su distribución, vendiéndose a tres reales cada una. Mas no siempre era este el precio normal. En los reparos puestos por el Cabildo de Corrientes a la rendición de cuentas que hiciera en 1781 el Mayordomo de la Iglesia Catedral Dr. Don Antonio Martínez, los cabildantes le reprochaban que en tiempos pasados se vendían las tacuaras "...cuando más caras, a 20 pesos o 160 reales cada carretada de a 50 tacuaras", o tres reales cada una. Dicho párroco, según los cabildantes,

"...no sólo carga a 4 reales cada tacuara, sino también carga el costo de peones, gastos de yerba, tabaco, alquileres de bueyes, caballos, y erramientas, de manera que cada tacuara sale cuando menos a dos pesos, siendo constante que el vecindario acarreo a su costa dichas tacuaras hasta la cercanía de esta ciudad cuio exceso en el valor de las tacuaras es tan perjudicial a la Iglesia, que se conoce palpablemente el artificio con que fundó dichas cuentas, esparciendo en diferentes partes el costo de dichas tacuaras, para no ser conocido esta maldad".<sup>4887</sup>

## **Ñ-XII El caballo.**

Los caballos eran su principal instrumento de trabajo al cual adiestraban y enseñaban especialmente para la tarea de faenar, enlazar, y pechar; en la cual ganaban a razón de medio real por cuero pagaderos en especie (yerba, tabaco). Incluido en el salario por cuero producido estaba la reposición por el desgaste o amortización sufrido por su instrumento de trabajo: la tropilla de caballos. Por el contrario, los peones destinados a desollar los animales carecían de caballos propios y operaban como caballerizos cuidando de las cabalgaduras de los vaqueros y ganando a razón de dos reales por cuero desollado. Aquellos peones que estaquillaban, apilaban, sacudían y prensaban los cueros también ganaban a razón de dos reales por cuero.<sup>4888</sup> En cambio, los peones caballerizos y a veces los peones barraqueros ganaban un salario por tiempo entre ocho y diez pesos cada mes. Las achuradoras eran casi siempre las mujeres y los niños que acompañaban a los peones en las carretas de cada expedición montada al efecto, las que asimismo operaban como cocineras y lavanderas.

Si bien el caballo era un instrumento de trabajo para vaquear, recoger, apartar, enlazar, bolear, arriar, pescar, pisar ladrillo, vender al menudeo o moler trigo, cuya propiedad convertía a su poseedor en un propietario de medio de producción, también es cierto que el caballo era un medio de transporte individual que le permitía a su propietario gozar de una mayor movilidad para vender, ocasionalmente, su fuerza de trabajo.<sup>4889</sup> Poseía a su vez el caballo, cuando no era castrado, la ventaja de poder reproducir su fuerza de trabajo en forma natural sin requerir de gasto alguno, salvo el fondo de reposición por la brevedad de su ciclo de vida útil.

Como es sabido, el acopiador o capitalista pagaba por la fuerza de trabajo contratada mucho menos que el valor producido por dicho trabajo. Aquellos acopiadores de cueros que supieron valerse de los reservorios de mano de obra indígena o miliciana acumularon grandes diferencias con las cuales engrosaron las filas de la nueva burguesía naciente. En nuestro caso de la corambre, por cada cuero producido y apilado en la barraca, el acopiador obtenía entre 10 y 23 reales según su peso o tamaño, y desembolsaba por él una suma de costos fijos y variables. Los costos fijos estaban constituidos por los medios de producción (desjarretadores, espadines, cuchillos, y estacas), los cuales se prorrateaban entre la totalidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en la hechura o construcción de 2350 cueros se insumieron en 1769 tres carros completos de estacas; y en 1784, para la construcción de 1031 cueros se insumieron 4 1/2 docenas de cuchillos, y solamente una media luna a un costo entre 12 y 21 reales cada docena de cuchillos.<sup>4890</sup> El costo variable estaba constituido por la fuerza de trabajo incorporada al producto, consistente en los vaqueros, los peones, y los barraqueros, trabajando a razón de medio real por cada cuero los primeros, y dos reales por unidad los otros; más el costo de las vituallas (yerba y tabaco), que oscilaba con el número de peones empleados, y el costo de flete, fluctuando este último con la mayor o menor distancia a los embarcaderos más cercanos.<sup>4891</sup> Los costos variables estaban constituidos por el alquiler de las carretas o flete.<sup>4892</sup>

### **Ñ-XIII Las provisiones de las vaquerías.**

Las provisiones mediante las cuales se avituallaba al personal de las vaquerías promediaba a razón de una libra de yerba de palos y dos libras y media de tabaco colorado por mes por peón, por un precio que en 1769 estaba a 20 reales cada arroba de yerba y \$4 1/2 cada arroba de tabaco.<sup>4893</sup> Los volúmenes de tabaco y yerba consumidos por la

población de la campaña, se pueden estudiar en forma indirecta a través de la estadística anual de los cueros producidos y/o exportados. Si tenemos en cuenta que el precio de la yerba fluctuaba entre 5 reales por arroba, o \$4 1/2 cada tercio en 1757; y 20 reales por arroba en 1765 o \$16 cada tercio en 1773; y que el precio del tabaco fluctuaba entre 16 y 32 reales la arroba; y que entre todos vaqueros, caballerizos, y peones barraqueros (habría 2000 hombres en la campaña de la Banda Oriental en 1784), alcanzaban a recibir cerca de \$40.000 anuales en retribución de su trabajo en las corambres, que se consumían en un 60 por ciento en yerba de palos y en un 40 por ciento en tabaco colorado, podríamos decir que las regiones rioplatenses productoras de cuero demandaban anualmente entre 100.000 y 200.000 arrobas de yerba y entre 40.000 y 80.000 arrobas de tabaco.<sup>4894</sup> Esta primitiva estimación no resultaría antojadiza si observamos que el mismo Azara menciona un promedio de 196.000 arrobas que salen de Asunción en el quinquenio 1788-1792.<sup>4895</sup> Considerando que cada peón acondicionaba entre 50 y 100 cueros por mes, según la intensidad de la vaquería, consumiendo en víveres en dicho período una libra de yerba de palos y 2 1/2 libras de tabaco en rama, y que una libra de yerba costaba entre 1/5 y 4/5 de real y que 2 1/2 libras de tabaco costaban entre 1 1/2 y 3 reales, concluiremos que el acopiador insumía como gasto variable para manutención de cada peón mientras durara la vaquería entre 1 7/10 real y 3 4/5 real cada 50 o 100 cueros. La provisión de vituallas era imprescindible, al extremo que lo primero que hacía un hacendado para iniciar una tarea, ya se tratase de un rodeo o una corambre, era arracionar sus peones con tabaco y yerba, pues de lo contrario no hallaba jornaleros.

Entre las causas por las cuales la campaña se hallaba en 1783 con muy pocos hacendados que tuviesen rodeos mansos un Fiel Ejecutor denunciaba: 1) la escasez de mano de obra, y 2) la destrucción del terneraje. La primera, que es la principal de las causas, se debe al hecho de no hallarse peones que se quisieran conchabar por meses corridos, debido a que "...sólo se conchaban cuando los conductores del abasto van a correr el ganado alzado".<sup>4896</sup> Esto ocurría por cuanto los hacendados

"...los abrigan dándoles de comer, teniendo 4, 5, y 6 en su casa, sin destino alguno, manteniéndose estos dichos peones de robos de ganados y caballos"<sup>4897</sup>

Careciendo los hacendados de mano de obra fija,

"...para entregar los novillos se ven en la precisión de pagarles a los referidos peones a 10 y 12 reales al día, de los que se ocupan en dicha corrida, que con estos costos que tienen el riesgo de la pérdida del ganado, sobre el abono que hacen aquí de \$2 por cada novillo, les suele salir puestos en los corrales muy cerca de 43 se manifiesta los perjuicios que a la causa pública infieren los que abrigan dichos peones y son causa de que no se conchaven por años o temporadas".<sup>4898</sup>

#### **Ñ-XIV La corambre de hacienda alzada.**

El problema se presentaba cuando las corambres eran practicadas por los mismos hacendados con hacienda alzada, ya sea en campos propios o realengos. El resultado de estas corambres era, para cada hacendado que la practicaba, inmensas pilas de cueros sin marcar, y lo que era peor, herradas con marcas heterogéneas. En la estancia de La

Mariscalá, la hacienda no se herraba y los cueros hechos (construidos) se admitían por orejanos por sobreentenderse la imposibilidad de herrarlos dado el inmenso número de los ganados alzados y la enormidad de las distancias a recorrer. Por otro lado, en tiempos de seca y falta de pastos aún en las estancias más próximas a los pueblos los ganados se alzaban y se marchaban a las serranías donde abundaban los pastoreos y aguadas y donde era imposible la yerra. De modo que las autoridades civiles admitían la posibilidad de otorgar guías a los cueros orejanos cuando estos procedían de ganados alzados. Pero este no era el caso cuando al cuestionarse la naturaleza alzada o realenga del ganado, los cueros resultantes podían considerarse mostrencos y no orejanos. Los primeros, a diferencia de estos últimos, debían ser comisados y rematados al mejor postor en almoneda pública. En estos casos se estaba a el diezmo que cada uno pagara, por lo que se nombraba por parte del Juez personas inteligentes en la materia.<sup>4899</sup>

#### **Ñ-XV La mano de obra a destajo.**

Si bien los jornales de la mano de obra a destajo empleada en las vaquerías sufrió una notable mejoría, de cuatro reales al día en tiempos del Virrey Ceballos (1778) a seis u ocho reales doce años después, no podríamos afirmar con certeza por carecer de la información respectiva, que los jornales rurales siguieran las oscilaciones del precio del cuero.<sup>4900</sup> El jornal por cada mil cueros faenados aumentó de \$50 a comienzos del siglo XVIII (1723) a \$62 1/2 en el año de mayor baja del precio del cuero (1769).<sup>4901</sup> Es decir, el jornal aumentó en medio siglo \$12 1/2 sobre un básico de \$50, lo que es decir un 25 por ciento. Quince años después (1784), los salarios rurales experimentaron un nuevo repunte aún más considerable. Felipe Flores y Francisco Sandoval (alias Chumingo), socios de ejercicio baqueros faenaron por orden de Antonio Pereyra a favor de la Administración de los Pueblos de Misiones y en el paraje El Daymán 6285 cueros cotizados a 3 reales cada uno, en los cuales trajinaron tres barraqueros a \$10 mensuales cada uno, insumiendo \$888 que deducidos de los \$2357 que importaron los cueros significaron \$739 para cada uno de los dos vaqueros, o el equivalente a \$225 cada mil cueros, más del triple de lo devengado por un baquero quince años atrás.<sup>4902</sup>

Pero si bien hemos comprobado que en la campaña de la Banda Oriental existió una inflación del salario a destajo o por piezas no lo hemos comprobado aún con respecto a los salarios fijos. De todos modos, la inflación del salario a destajo fue función del boom del cuero. Pero tan pronto como se fueron agotando las existencias de ganados orejanos la demanda de mano de obra estacionaria se fue reduciendo precipitadamente, y por consiguiente se fue deprimiendo el salario a destajo. Con el agotamiento de las haciendas orejanas creció enormemente el abigeato o cuatrismo así como la necesidad de poblar las tierras realengas.<sup>4903</sup> En 1799 el Capitán Jorge Pacheco,<sup>4904</sup> propuso un famoso plan para terminar con los robos de ganados,<sup>4905</sup> y en 1801 encaró la conocida expedición contra los indios Charrúas y la fundación del pueblo de Belén.<sup>4906</sup> Un año más tarde, en 1802, un numeroso grupo de hacendados de Gualaguaychú da cuenta también de los robos de ganados y pide que se adopten medidas para evitarlos.<sup>4907</sup>

#### **Ñ-XVI Reglamentación de la marca y la contramarca.**

Estos cambios de la realidad rural exigieron reglamentar la marca y la contramarca, y perseguir el cuatrismo. En el caso de corambres con hacienda de marcas heterogéneas, al ser vendidos los cueros a los acopiadores, se prestaban a ser denunciados por los dueños de las marcas al extremo de serles secuestrados los mismos por la autoridad respectiva. Por

cierto que, de esta mescolanza de cueros con marcas distintas, quienes sacaban ganancias extraordinarias eran los faeneros clandestinos, los gauderios, y los pulperos sin escrúpulos, que reducían cuanto cuero les llegaba a sus manos. Para combatir este caos, las autoridades dictaron en 1791 un bando exigiendo a los compradores de cueros la contramarca correspondiente en cada cuero adquirido.<sup>4908</sup> Esto les significaba a los comerciantes una dificultad imposible de remontar. Indignado por los perjuicios que le irrogaba este bando un comerciante declaraba en 1792 que

"...el comercio de los cueros se hace comprando a los criadores a 4, a 6, a 8, o a más número y que estos tienen sus estancias en las dilatadas campañas de aquel territorio distantes unas de otras 15, 20 o 30 leguas, y que le es imposible al comprador andar con los cueros que a comprado de estancia en estancia para contramarcarlos sin hacer unos gastos que importan diez tantos más que el valor que tengan estos cueros conducidos a esta Capital y así o le sería indispensable al comprador abandonarlos por inútiles o conducirlos para ser secuestrados sin haber delinquido en su adquisición".<sup>4909</sup>

Finalmente, debemos concluir que el motivo fundamental de la crisis en la Banda Oriental residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias, y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda Oriental residiría entonces del lado de la oferta de mano de obra rural, debido al fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

## Capítulo II-F-18      **Colapso del *entrepôt* mercantil y lucha en el *hinterland* contra el monopolio comercial**

### Índice

- O-I    Velocidad diferenciada en el ajuste entre oferta y demanda
- O-II   Balanza comercial positiva o activa.
- O-III   Balanza comercial negativa.
- O-IV   Deficits comerciales externos.
- O-V    Lucha contra el monopolio mercantil.
- O-VI   Contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.
- O-VII   Declaraciones de guerra.

- O-VIII Exportaciones legales de plata.
- O-IX Amenaza militar Portuguesa.

## **Introducción del capítulo II-F-18**

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Río de la Plata, o en otras palabras, la no resolución de sus contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales, habría estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis económicas, políticas, militares, sociales y eclesiásticas que la precedieron. Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura estamental de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento mercantil), habrían sido las crisis comerciales. En cuanto a la historiografía de las crisis comerciales propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata y cueros y el doble sometimiento del *entrepôt* porteño al capital comercial metropolitano, establecido en las metrópolis mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.<sup>4910</sup> El error de las tesis acerca de las plazas mercantiles, mineras y rurales coloniales, ha sido no tomar en cuenta que pese a la circulación transitoria del crédito escriturario y la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, la impotencia política para equilibrar los desfases crónicos de la balanza comercial habría frustrado una movilidad y monetización de sus mercados y una capacidad de engendrar una burguesía comercial autónoma.

La exposición que parcialmente explicaría el porqué de la existencia en las colonias de una marcada impotencia para combatir eficazmente los rasgos particulares del orden imperial-absolutista (patriarcalismos, etno-centrismos, nepotismos, patrimonialismos, corporativismos, mercantilismos), y engendrar una burguesía comercial autónoma, habría que buscarla entonces en la ambigua naturaleza, compulsiva o autónoma, de los mercados coloniales y en la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, muchos de ellos de naturaleza especulativa. Según Chaunu (1969) y Mauro (1964), siguiendo la Teoría Cuantitativa del Dinero, existe una concordancia entre los niveles de precios y las fases expansivas y depresivas experimentadas por Europa y los niveles y fases experimentados por el mundo colonial.<sup>4911</sup> A la depresión y caída de la tasa de ganancia en la metrópoli correspondía entonces casi siempre, una expansión del colonialismo, que habría desmoronado toda autosuficiencia y pluralidad de actividades en las colonias. La crisis minera en el siglo XVII y comienzos del XIX carecería, para esta interpretación, de motivaciones propias referidas a la geología del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y sería más bien un efecto de la caída de la demanda Europea de metálico.

Por otro lado, debido a la naturaleza del mercantilismo colonial, cuando en la América colonial regía una fase depresiva, las embrionarias burguesías comerciales locales estaban impedidas, salvo excepciones o permisos reales especiales, de vender sus excedentes no sólo en el mundo Europeo sino incluso en el resto del mundo colonial español y no español. Como las crisis de los desequilibrios negativos no podían ser entonces resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones,<sup>4912</sup> las únicas acciones que le quedaban a un gobierno local colonial para corregir el desequilibrio comercial eran incrementar la producción exportable o reducir el

volumen bruto de las importaciones. Las caídas bruscas de los precios internacionales de los productos de exportación no podían ser atenuadas entonces por medio de una devaluación de la moneda nacional y tampoco las ganancias de los exportadores podían ser multiplicadas automáticamente por igual recurso.

El alto costo de la mercancía importada, las altas tasas de interés, la prohibición de envilecer (devaluar) la moneda, y la imposibilidad de discriminar mediante un proteccionismo tarifario la índole de la mercancía importada, estaban íntimamente vinculados con la expansión del crédito mercantil y de las cesiones de crédito. Precisamente, el boom del crédito mercantil se produjo porque existía dinero mercancía o moneda dura y yerba y cueros crudos para extraer y remesar al interior del espacio colonial y a la metrópoli, en pago de la mercancía importada.

La inyección de medios de pago escriturarios privados --descrita en el primer tomo de esta obra-- debe haber alentado una reducción relativa de las tasas de interés, comparadas con las vigentes a comienzos del siglo XVIII y con las vigentes en el Alto Perú, aunque siempre superiores a las prevalecientes en Cádiz y los demás puertos de Europa. En cuanto a los productos del mercado interno colonial, impuestos por las burguesías comerciales regionales (dueños de curtiembres y obrajes textiles Tucumanos, de bodegas y viñedos Sanjuaninos, de plantaciones Paraguayas y Misioneras, y de estancias de cría de mulas del litoral), al participar del excedente económico explotado por la burguesía minera, es difícil pensar que el nivel de sus precios de venta siempre permaneciera estancado.

## **O-I Velocidad diferenciada en el ajuste entre oferta y demanda**

La velocidad diferenciada en el ajuste entre la oferta y la demanda de las partes que concurrían a los mercados dependía de la situación socioeconómica de dichas partes, condicionada en el comercio por el azar político, gobernado este último factor a su vez por los períodos de paz o guerra, o los llamados tiempo muerto y tiempo de navíos. De aquí que la parte, ya fuere demandante u oferente, que pudiese elegir el tiempo o momento para vender o comprar se encontraba en mejor posición negociadora que aquella otra que se veía en la obligación de vender o comprar forzada por la necesidad.<sup>4913</sup> Fue Melchor de Soria, un economista del siglo XVI, quien primero distinguió la velocidad de ajuste según fueren oferentes o demandantes quienes la practicasen. Según Gómez Camacho (1986), Soria hablaba de la velocidad con que los oferentes reducían su precio, y de la velocidad con que los demandantes decidían pagar un precio mayor. Cuanto más rápida fuera la velocidad de ajuste asumida por los oferentes, más lenta podía ser la asumida por los demandantes, y viceversa. Cabe entonces preguntarse si las crisis comerciales se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si durante las crisis comerciales aumentó el margen de autonomía de embrionarias burguesías comerciales, por cuanto fue durante las épocas de bonanza que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites locales. Para estudiar las crisis comerciales y su impacto en las instituciones del Antiguo Régimen, deberemos de analizar entonces las balanzas comerciales, las remesas de plata a España, y el comportamiento de los mercados de bienes de inversión o de renta, de los precios de los productos de la tierra, de la mano de obra esclava, de los predios urbanos, y del dinero escriturario.

Los desequilibrios positivos en la balanza comercial, al poner en evidencia la escasez de mercancía importada y la abundancia y escaso costo de producción de la mercancía-plata exportada testimoniaba situaciones inflacionarias. Según la Teoría Cuantitativa del Dinero, formulada por Fisher (1911), la inflación o encarecimiento de las mercancías importadas y su impacto en la estructura de precios relativos, no es la producida por el deterioro o envilecimiento de un medio de pago (de metal o papel), sino la producida por la alteración de la relación cuantitativa entre la oferta de moneda y la de bienes importados. La alteración de la oferta de moneda podía ser provocada tanto por un aluvión de metálico como por excesivas emisiones, descuentos y redescuentos de crédito privado. La alteración de la oferta de mercancías importadas podía a su vez ser provocada por cambios en las circunstancias del comercio exterior y en las condiciones crediticias otorgadas. Cuando el monto de lo importado y luego fiado al interior excedía el monto de lo remesado al exterior los precios caían, y cuando por el contrario el monto de lo remesado excedía el monto de lo importado y luego fiado los precios sufrían un proceso inflacionario.

## **O-II Balanza comercial positiva o activa.**

Una balanza comercial, positiva o activa, podía significar atraso y decadencia, si lo que se importaba eran efectos de consumo improductivo y no bienes de capital, y si lo que se exportaba fueren materias primas sin manufacturar y no productos con alto valor agregado.<sup>4914</sup> Por lo general, las balanzas comerciales positivas, favorables, o activas en la América Latina colonial, revelaban empobrecimiento y no prosperidad. En el caso del Cono Sur las balanzas comerciales ocultaban el monto y valor de las importaciones clandestinas de mercancía Europea, Africana y Lusitana, así como el monto de las remesas de plata clandestinas exportadas a Europa a través del Brasil y Portugal. Es preciso tener en cuenta para analizar estas balanzas comerciales que antes del Reglamento de Libre Comercio de 1778 las autoridades virreinales autorizaban la extracción de metálico del enclave minero Alto peruano al entrepôt porteño sólo a cambio de licencias de internación de mercadería importada, una suerte de guía, procedentes de permisos de registro autorizados por la corona y de licencias de internación de productos de la tierra (mulas, yerba, textiles, y aguardiente). Sólo a partir de 1778, con la Real Ordenanza de Libre Comercio, la relación se invierte, y el Virrey del Río de la Plata prohíbe la extracción del metálico del Alto Perú a los entrepôts del pacífico, Lima o Arica. Asimismo, estas balanzas ocultaban el monto de las remesas destinadas a la corona como consecuencia de su poder fiscal absoluto. La plata de estas últimas remesas no funcionaría como mercancía que salda importaciones sino como divisa que se tributa compulsivamente a un gobierno metropolitano. Por otro lado, la balanza comercial ocultaba el monto total de tabaco brasileiro introducido en el mercado colonial al margen del Estanco Real. Revelan estas balanzas comerciales positivas o activas empobrecimiento porque además ocultaban la baja retribución de la mano de obra en la producción de la materia prima exportada y la inversa en la producción de los artículos importados. De aquí que los saldos positivos reales obtenidos por la metrópoli española, como consecuencia del intercambio desigual con sus colonias americanas al no reinvertirse en las mismas, le permitía saldar la crónica balanza comercial deficitaria que mantenía con la Europa nor-occidental (Francia, Inglaterra, Países Bajos).<sup>4915</sup>

## **O-III Balanza comercial negativa.**

Una balanza comercial "desfavorable", negativa, o pasiva podía significar el propósito de alterar radicalmente la estructura económica y social de la modernidad mercantil-absolutista, si lo que se importaba fueren bienes de capital y no efectos de consumo improductivo y lo que se exportara fueren productos con un alto valor agregado y no simplemente materias primas sin manufacturar. Este último propósito era el único que podía legitimar desequilibrios negativos en la balanza comercial. Es evidente que en la situación colonial que vivía el Río de la Plata al exportar sólo moneda metálica y materias primas como la yerba y el cuero sin curtir, por serle legalmente vedada la manufactura, e importar predominantemente artículos suntuarios que le eran inducidos compulsivamente por el monopolio comercial, las balanzas "desfavorables" sólo podían significar crisis, desempleo y profundización de la economía natural.

#### **O-IV Déficit comerciales externos.**

Un déficit comercial externo acarreaba necesariamente asfixia monetaria pues había fuga del dinero-mercancía (circulante primario) y las tasas de interés se disparaban hacía arriba. Debido a que las crisis de los desequilibrios negativos no podían ser resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones, en virtud de que por su condición colonial el Río de la Plata carecía de soberanía monetaria y fiscal, las únicas acciones que le quedaban para corregir el desequilibrio eran incrementar la producción exportable o reducir las importaciones.<sup>4916</sup> Las caídas bruscas de los precios internacionales de los productos de exportación tampoco podían ser atenuadas por medio de devaluaciones.<sup>4917</sup> La única oferta monetaria interna posible dependía entonces de la producción minera nacional y/o del balance superavitario del comercio exterior.<sup>4918</sup> El único tipo de equilibrio de la balanza comercial que podía interesar a países subordinados o coloniales como el nuestro era entonces aquel que lograra transformar la estructura económica colonial. Ello requería, necesariamente, la expansión de la inversión por encima del ahorro, para lo cual se necesitaba reducir drásticamente las altas tasas de interés vigente o, de lo contrario, contraer empréstitos en los mercados de capital foráneo, como recién se pudo concretar con resultados escandalosos en los inicios de la república independiente.

La explicación de las balanzas deficitarias en las colonias y de su consecuencia la escasez de metálico, se la suele hallar en el carácter privilegiadamente monopolístico del nuevo grupo exportador, que le permitiría a la metrópoli colonialista pagar precios demasiados bajos a cambio de los frutos del país colonizado. Mediante la sobre-valoración de los productos importados y la sub-valoración que le fijaba a las materias primas coloniales, el monopolio comercial español impuso a sus colonias una balanza comercial deficitaria. Estas balanzas deficitarias eran la expresión más genuina de la intensa transferencia de valor sufrida por las colonias y del deterioro de los términos del intercambio experimentado por las mismas.<sup>4919</sup>

#### **O-V La lucha contra el monopolio mercantil.**

Sin embargo, en las antesalas o prolegómenos de la independencia, a semejanza del macizo andino, el control que en el Río de la Plata la metrópoli española ejercía de su aparato estatal y su comercio distaba de ser monopolístico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) el monopolio español había dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo puramente eventual. La lucha contra el monopolio convirtióse entonces, en los prolegómenos de la Revolución de Independencia,

en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en la realidad histórica prevalecía en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en buques neutrales, un libre cambio cuasi internacional. A tal extremo eran distintas las condiciones en esta coyuntura bélica que Don Juan de la Rosa, apoderado de la Real Compañía Marítima, manifestaba en el expediente sobre faenar ganado orejano en los campos yermos de la banda oriental del Río de la Plata que

"...en tan calamitosa época no han decaydo los frutos y cueros...como en otras guerras, pues en la anterior [guerra] fueron abandonados [los cueros] por lo difícil de su conservación, por no sufragar con el valor de los ganados los costos que impendían en su conservación [almacenamiento]".<sup>4920</sup>

Es recién después del Reglamento de Comercio Provisorio de 1809, cuando se decreta el Libre Cambio en el comercio exterior, que la lucha contra el monopolio se transfiere del comercio exterior al comercio interno. Halperín (1979), nos advierte cómo, a partir de 1809, los comerciantes españoles ligados al Consulado buscaban preservar el monopolio del comercio interno, vedando la participación de los extranjeros.<sup>4921</sup>

## **O-VI La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.**

La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era de una naturaleza ambigua. Dicha ambigüedad estribaba en la presencia amortiguadora del mercader-estanciero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades.<sup>4922</sup> La burguesía comercial buscaría en los terratenientes apoyo contra la gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada al capital del enclave minero altoperuano, a fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino. De manera tal que el resultado de las reformas borbónicas y de la revolución de independencia en el comercio no sería la liquidación de los agentes de los monopolistas, sino la atribución de un estatuto legal al pequeño comercio, y su ampliación.

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción da lugar a lo que se dio en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superávits o déficits. A partir de 1783, en que se firmó la Paz de Versailles, se registró en Buenos Aires un marcado superávit de la balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, la importación alcanzó algo más de un millón de pesos y la exportación de plata, liberada de las restricciones Limeñas, excedió los tres millones. Los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.<sup>4923</sup> Aquí corresponde que hagamos un compás y nos formulemos la misma pregunta que se hace Bakewell (1976) para el caso de Nueva España ¿a que podía obedecer esta discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias? Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera, de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda, la que más se ajustaría a la realidad colonial sufrida en el Río de la Plata, de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar, de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz.<sup>4924</sup> Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria,

montando lo importado más de 6 1/2 millones de pesos y lo exportado en plata apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los precios. En los dos años siguientes los precios se equilibraron porque las importaciones y las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la balanza se vuelve a desequilibrar en cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las exportaciones de plata a sólo 2 1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los precios. El Cuadro P-A nos ilustra los precios de los textiles en Chuquisaca, Cochabamba, y en San Lorenzo de la Barranca, en el año de 1788, un año de paz en el comercio Atlántico, así como también los precios en Buenos Aires según el aforo asignado por la Aduana. De la diferencia de dichos precios y sin computar los gastos en transporte y gabelas, el mismo Cuadro nos ilustra acerca de la ganancia obtenida entre ambos mercados. Mientras que con la vara de chamelote se obtenía el margen de ganancia más bajo, entre el 60% y el 140%, con la pieza de bretaña angosta superfina y la bayeta de Castilla se lograban los márgenes más altos, entre el 220% y el 300% respectivamente. También con productos locales como la yerba, las mulas, el vino, y el tabaco se obtenían grandes márgenes de ganancia. Si una arroba de yerba comprada en Paraguay a 5 reales, costaba 20 reales cuando arribaba a Buenos Aires; 28 reales cuando era introducida en Córdoba, y 75 reales en Santiago de Chile, podemos comprobar que la tasa de ganancia, sin computar los fletes, comisiones, y seguros, alcanzaba al 1500%.<sup>4925</sup> De igual modo, si por una mula de tres años comprada en Buenos Aires a \$6, e introducida en el Alto Perú, alcanzaba entre los \$24 y los \$35 podemos estimar que la tasa de ganancia cuadruplicaba los costos iniciales.<sup>4926</sup> Pero es evidente que no es el mismo individuo quien hace la compra y quien se beneficia más tarde de la venta: los gastos de transporte, los impuestos y los riesgos de la operación deben ser computados. En el caso del tabaco del Paraguay, relatado por Arias Divito (1976), como en el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia externa, sus precios en Buenos Aires no producían beneficio alguno, sino pérdidas.<sup>4927</sup>

## **O-VII Las declaraciones de guerra.**

Con las declaraciones de guerra, no todos los productos de la tierra o frutos del país sufren una caída en sus precios. Ciertos productos que no eran de exportación, como el aguardiente, sustituto de algunas bebidas que en tiempos de paz se importaban, experimentan alzas hasta del 50%. En efecto, mientras que antes de promulgarse la guerra corría la venta de aguardiente en Buenos Aires a \$14 y 2 reales cada barril, una vez declarada la guerra en 1779 la unidad llegó a costar en Buenos Aires \$20, más \$7 de flete.<sup>4928</sup> Don José Aguilar, un vecino de Mendoza, manifiesta en un litigio que sostuvo en 1739 en Buenos Aires con un Alférez de Navío llamado Luis D'Orselles "...no hallar conveniencia de comprar caldos por estar adelantado el tiempo cuando llegue a Mendoza".<sup>4929</sup> Si se compraba algún vino al fiado "...era exponerse a perder cuando menos la mitad" por estar cercana la vendimia. Si se compraba de los caldos añejos se reportaba solo pérdidas "...por los subidos precios a que se venden en Mendoza".<sup>4930</sup> Guardada la proporción del costo principal y las pérdidas por las quiebras y mermas "...suele valer la botija de vino o aguardiente más en Mendoza que aquí [Buenos Aires]".<sup>4931</sup> Es público y notorio, según Aguilar,

"...que la botija de vino añejo y electo...no se sacará [de Mendoza] por menos de 9 o 10 pesos y la de aguardiente por menos de \$12, que con \$2 de sisa el aguardiente, y \$1 el vino, y \$5 de flete, mermas, y quiebras, no baja el vino de \$18 o \$19, y el aguardiente viene a costar más de los \$20".<sup>4932</sup>

Casi cuarenta años después, en 1778, un año de paz en Europa, Facundo Prieto y Pulido, en nombre y como apoderado de Pedro Giráldez, infiere en un juicio que la botija de vino no podía valer en Mendoza \$8 cada una, como lo sostiene Alexandro Suárez, "...a influjos de Escalada", pues sumados a este precio "...el flete de cada botija de \$5 y 4 1/3 reales; la alcabala de 2 reales; el derecho de mojón de 1 real; y los de comisión, venta, y almacenaje de 5 reales, ascendería el costo de una botija en Buenos Aires a \$16 y 1/3 reales, cuando "...aquí nunca se ha vendido el vino por más precio, si no por menos", y allá "...no vale la botija de vino si no \$5 cuando más...que es el precio sentado [en Mendoza] para graduar los réditos de las capellanías".<sup>4933</sup> Este precio era, según Pulido, más que público,

"...porque en la provincia de Cuyo, no pueden cambiar sus frutos, a otros [frutos], de que necesitan para la vida humana, ni tienen facilidad de adquirirlos, sino extrayendo de allí sus cosechas".<sup>4934</sup>

Extrayendo sus frutos de Mendoza, y remitiéndolos a Buenos Aires, lograrían, si no un lucro, al menos "...verían en moneda el precio [de su vino]", con el cual adquirir los otros frutos necesarios para subsistir.<sup>4935</sup> No todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas alcanzaban entonces los mayores precios en los puertos de salida, como el de Buenos Aires. En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar, la cera y la coca.

También el sebo ofrecía oscilaciones cíclicas por arroba. En 1781 los hacendados apenas lograban por arroba de sebo el bajísimo precio de 3 reales

"...en que no es posible que se costeen, por esta causa desmayan en el fomento de sus estancias y haciendas y las que podían rendir pingüísimos emolumentos para enriquecer a sus dueños y aún a las Provincias se reputan de ordinario como un depósito de caudales muertos sin giro y sin utilidad alguna".<sup>4936</sup>

Lo que se ve palpablemente en el mismo precio de 3 reales a que corre el sebo en 1781, es que

"...si antes, en un tiempo regular en que no había luminarias ni Malvinas, ni Poblaciones Patagónicas ni el numerosísimo concurso de gentes que diariamente consumen mucha porción de sebo, su precio corriente era el de dos reales y medio: ahora que sólo ha subido a medio real más de valor desde luego es incomparablemente mayor la abundancia serbaia proporcione".<sup>4937</sup>

No obstante el dinamismo del comercio en períodos de paz, no todos los mercaderes salieron airoso de la competencia reinante. Con la intensa competencia existente en los períodos de paz los productos procedentes de Europa sufrieron una innegable tendencia a la baja. Tan era así que a fines de esa época, en 1789, el comerciante Manuel Riesco, avecindado en Santiago de Chile, según revela Villalobos (1968,1990), se quejaba de la abundancia de mercaderías.<sup>4938</sup> El poderoso comerciante Gaspar de Santa Coloma le escribía a Agustín Arrivillaga,<sup>4939</sup> informándole de la quiebra "maliciosa" de Juan Costa el Catalán,<sup>4940</sup>

"...en la que me coxe 3.000 pesos que perderé por ser Balista y si fuere escriturario me sucedería cuasi lo mismo pues de 75.000 pesos que debe ni se han de recoger

25 y si en ésta no se hace un egemplar con estas quiebras maliciosas y de ninguna fe han de seguir muchos este camino",<sup>4941</sup>

Como consecuencia de estas quiebras maliciosas Santa Coloma declaró haber perdido 12.000 pesos, pero Juan Antonio de Lezica y Francisco Ignacio de Ugarte y Arrivillaga, este último concuñado de Santa Coloma,

"...tendrán mucho mas [de pérdida] por los crecidos caudales que tienen en el Perú y malas cuentas que ban dando nuestros inquilinos, en fin paciencia y bamos cubriendo nuestro crédito que es lo principal".<sup>4942</sup>

Asimismo, Santa Coloma declaraba que su concuñado Ugarte y el yerno del mismo, Ignacio de Rezabal,

"...están llorando la baxa de la moneda y más aflixidos que el pobre más mísero que a la berdad me dá berguenza oyrlos con que así no extraño pretendan que Vm. los sirva de balde".<sup>4943</sup>

Las Tablas P-I y P-II revelan que Ugarte y su socio y suegro Vicente de Azcuénaga habían concertado en tiempos mejores, entre 1752 y 1787, más de un centenar de operaciones (115) de fiado por valor de \$1.209.135. Pero a fines de 1787, Ugarte otorga fiadas a Juan Francisco de Echechipia mercaderías por la increíble suma de \$182.663, la cual sin duda debe haber sido la causante de su ruina.

Más aún, el antiguo mozo de tienda de Santa Coloma, Martín de Álzaga,

"...camina para el Perú porque su hermano [Francisco Ignacio Alzaga] no le socorre con nada, y contemplo terminarán un pleito en este negocio según beo aparejadas las cosas, y otros varios de esta capital me recelo también tengan que tomar este partido".<sup>4944</sup>

A fines de 1789 la actividad comercial se recuperó, dejando un tendal de víctimas, de aquellos que quedaron atados a créditos de compra especulativa. Durante los nueve años que restaron hasta 1797, año de la Guerra de la segunda Coalición contra la Francia revolucionaria, la balanza fue altamente favorable por fluctuar las importaciones en alrededor de dos millones anuales mientras que las exportaciones superaban el promedio de los tres millones anuales y registrándose como reflejo de la misma una prolongada caída de los precios. Sin embargo, los saldos favorables o superavits de la balanza comercial porteña no debe ilusionarnos --como a Levene (1952)-- acerca de la salud económica del virreinato. Una balanza comercial "favorable" puede ser el síntoma de un aumento de la riqueza, pero también puede ser, según lo constata Schumpeter (1984), el síntoma de un proceso de empobrecimiento.<sup>4945</sup>

El estudio de la balanza comercial deberá continuar con el de la participación que tuvo Buenos Aires en la renta minera procedente de los enclaves mineros del Alto Perú y de Chile, ilustrada por el total de la plata y oro exportada según la información brindada por la recaudación fiscal (Cartas Cuentas) y los registros de caudales. En los años del Asiento Inglés (1720-40), el Gráfico P-III, fundado en la Tabla P-III, demuestra que el porcentaje de plata legalmente enviado a España a través de Buenos Aires alcanzó al 12.2%, a través del Callao al 67.6% y a través de Cartagena al 20.2%, sobre un total de 40 millones de pesos exportados de toda la Sudamérica hispana. Si en su lugar, consideramos

a toda la América Latina, de un total de 131 millones, el Gráfico P-IV, fundado en la Tabla P-IV, demuestra que sólo 3.2% fueron enviados a través de Buenos Aires, 17% a través del Callao, 5.7% a través de Cartagena, y 58.9% a través de Veracruz, Acapulco, y Valparaíso.

### **O-VIII Las exportaciones legales de plata.**

Durante la tercera década de los buques de registro (1740-49) el porcentaje promedio de las exportaciones legales de plata a España a través de Buenos Aires crecieron al 15.3% de un total de 13 1/2 millones para toda Sudamérica excluyendo a Caracas, con Cartagena contando con el 20.2%, y el Callao con el 64.5% (Gráfico P-III fundado en la Tabla P-III). Con los envíos promedio de plata anuales caídos a la mitad (de 2 millones a 1 millón) debido a la Guerra del Rey Jorge o de la Sucesión de Austria (1739-48), entre España e Inglaterra, el incremento relativo de envíos a través de Buenos Aires debe haber tenido, obviamente, un impacto negativo en los comerciantes de Lima. Como resultado de la Real Orden de 1749 y la condiciones de post-guerra en la década del 50, el porcentaje de exportaciones de plata a través de Buenos Aires creció 14 puntos, alcanzando al 29.3% sobre un total de 33 millones para toda Sudamérica, y 5 puntos, o el 7.7% de un total de 126 millones para toda la América Hispana, habiendo Cartagena caído 7.7 puntos (12.5% y 3.3% respectivamente) y el Callao 6.3% (58.2% y 15.4% respectivamente) mientras que Veracruz, Valparaíso y Acapulco alcanzaban al 60.5% para toda la América Hispana (Gráfico P-IV fundado en la Tabla P-IV). En la misma década, el porcentaje de exportaciones de oro subió en Buenos Aires al 4.6% y en Cartagena al 55.9% de un total de 27 1/2 millones en oro para toda la América Hispana (Gráfico P-V fundado en la Tabla P-V).

En la década del 60, como consecuencia de las hostilidades militares con las colonias portuguesas del Brasil, el comercio exterior se vio afectado. El porcentaje de plata a través de Buenos Aires cayó 9.5 puntos, alcanzando al 19.8% de un total de 48 millones para toda Sudamérica, y al 8.3% de un total de 113 1/2 millones para toda la América Hispana. En forma similar, las exportaciones de plata desde Cartagena cayeron 10 puntos, alcanzando al 2.4% y 1% respectivamente, y desde Veracruz y Acapulco alcanzaron al 30% de todas las remesas de la América Hispana, mientras que las exportaciones desde el Callao subieron 19.6 puntos alcanzando al 77.8% y 32.8% respectivamente. En la misma década, las exportaciones de oro desde Buenos Aires subieron 4.6% y desde Cartagena 48% de un total de 26 1/2 millones para toda la América Hispana (Gráficos P-V y P-VI, fundados en las Tablas P-V y P-VI).

Para conocer qué porcentaje de las acuñaciones de Chile y Potosí fueron remesadas a Buenos Aires será preciso desagregar dichas remesas entre las partidas procedentes de ambas regiones citadas. Sabemos que para el período 1757-75, del total de remesas a España \$3.272.624 en monedas de oro y plata vinieron de Chile y \$14.465.624 del Alto Perú. Si promediamos anualmente este total alcanzamos la cifra de \$181.812 extraídos anualmente de Chile y \$803.611 del Alto Perú. En la hipótesis de que estas cifras fuesen fijas para todo el período 1757-75, obtenemos de la cifra total brindada por Romano (1965) y Sierra (1956-59) los porcentajes anuales de las monedas acuñadas en Chile y el Alto Perú que fueron remitidas a Buenos Aires, y de ellas alcanzamos un número promedio de 36% y 12% respectivamente. Consecuentemente, encontramos que de 4 millones de pesos en mercaderías introducidas en Chile desde Buenos Aires, los comerciantes retornaron a Buenos Aires algo más de 3 millones en moneda dura, es decir, dejaron un déficit de casi un millón de pesos. Por el contrario, de un total de 13 millones de

pesos en mercaderías introducidas en el Alto Perú desde Buenos Aires, el Gráfico P-VII, fundado en la Tabla P-VII, nos informa que los comerciantes retornaron a Buenos Aires 14 1/2 millones en moneda dura, o un excedente de \$1.350.000. La única explicación posible para tan bajos volúmenes de extracción, es que los comerciantes ocultaban sus remesas de plata y oro a Buenos Aires debido a las extremadamente altas tasas fiscales que tenían que erogar para remesar dichos caudales a España. Estas tasas alcanzaron al 6% para el oro y el 13% para la plata. Amén de las altas tasas fiscales, este período fue golpeado por una depresión general causada, en parte, por términos crediticios más cortos otorgados por el capital comercial inglés en Cádiz y el bloqueo militar de la Colonia del Sacramento.

## **O-IX La amenaza militar Portuguesa.**

A semejanza de la Guerra de Sucesión de España (1705-1713), la amenaza militar Portuguesa a partir de la firma del Tercer Pacto de Familia (1761), firma por la cual España entró en la Guerra de los Siete Años (1756-63), hasta que se acordó la Paz de París (1763), impuso un drenaje de plata de tal magnitud a las autoridades españolas en Buenos Aires, que absorbía las ganancias de la clase productora e incluso de la clase intermediaria, atentando así contra la posibilidad del estado colonial de perpetuar su dominación.<sup>4946</sup> Los \$130.000, o 12% de la plata acuñada, enviada hasta 1761 como subsidio o situado real, creció considerablemente durante el gobierno de Ceballos, doblando el subsidio Peruano al Panamá. Los ingresos fiscales de la Aduana de Buenos Aires en ese período eran ínfimos. En 1767, con el objetivo de ayudar a la gobernación del Río de la Plata, la corona ordenó enviar además del situado Potosino, el de Oruro y La Paz.<sup>4947</sup> En 1770, los ingresos de la Caja de Chucuito tuvieron que ser incorporados con el Situado Real alcanzando un monto de mas o menos un millón de pesos o el 33% de la producción minera del Potosí.

Como consecuencia de la paz firmada entre España y Portugal en San Ildefonso en 1777, y de la reducción impositiva de las remesas de metálico a España del 5% al 2% en el oro, y del 10% al 5 1/2% en la plata, las remesas de plata se incrementaron. En efecto, en la década que sigue a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Comercio (1779-89) y como consecuencia de la prohibición virreinal de extraer metales del Alto Perú vía Lima, el porcentaje promedio de las exportaciones anuales de plata a través de Buenos Aires subieron 19 puntos, o el 34% de las remesas de plata Callao-Buenos Aires, y a través del Callao cayeron 19 puntos, al 66%.

Sabemos también que para el período 1776-1804, del total de remesas enviadas a España 14 1/2 millones de pesos en monedas de oro y plata vinieron de Chile, o un promedio de 1/2 millón de pesos anual, y 44 millones vinieron del Alto Perú, o un promedio de 1 1/2 millón anual. Asumiendo la hipótesis de que el 100% de la mercancía introducida al Alto Perú y Chile (incluidos los esclavos) fue sobre la base de consignaciones otorgadas en Buenos Aires, y que el 76% de la mercadería adelantada notarialmente en Buenos Aires entre 1776 y 1804, fue enviada al Alto Perú y el 24% a Chile a cambio exclusivo de oro y plata y nada a las ciudades intermedias, podríamos concluir que 20 1/2 millones fueron enviados al Alto Perú y 6 1/2 millones a Chile, totalizando 27 millones. De aquí descubrimos que, de 6 1/2 millones de pesos en mercadería presumiblemente introducida en Chile, los comerciantes retornaron a Buenos Aires 14 millones en moneda dura, o un excedente de 8 1/2 millones; y de 20 1/2 millones introducidos en el Alto Perú los comerciantes retornaron a Buenos Aires 47 millones en moneda dura, o un excedente de 23 1/2 millones.

Del sumario general de la Real Hacienda registrado en las Cartas Cuentas enviadas al monarca, sabemos que para el período 1776-1804, 39 millones fueron enviados de Potosí a Buenos Aires como fondos públicos, es decir, el 34.7% de la acuñación potosina. Aún sin tomar en cuenta las remesas privadas de Potosí a Buenos Aires, observamos que lo que el Tesoro de Buenos Aires embarcó para España (47 millones), apenas excedió lo que públicamente recibió de Potosí a través del Real Situado (39 millones). Por lo tanto, aquellos fondos privados recibidos por Buenos Aires por encima del Real Situado (5 millones), constituyen tal como Santamaría (1982) lo ha expresado, la acumulación mercantil interna de Buenos Aires.

En resumen, reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonso (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), París (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobrevaloraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

## **Epílogo Sección II-F**

Sumada a la crisis social y esclavista, podemos agregar la existencia de una crisis minera. La deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.<sup>4948</sup> Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.

Cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra. Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese tiempo, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.<sup>4949</sup> Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.

De igual modo a la crisis minera, también se produjo una profunda crisis agraria. La importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos nos permitió descubrir sus efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;<sup>4950</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>4951</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los campos”, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un desorden o metanastasis en todo el litoral rioplatense.

La crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos fiscales y las levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;<sup>4952</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>4953</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario.

A todas estas crisis, debemos añadir la crisis mercantil, central en el orden mercantilista. Reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por

siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonso (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), París (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobre-valoraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

## **Sección II-G      Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial**

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido a las necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia aún más patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los señores indianos o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento rentista integrado por censuistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de ingenios de moler metal (usufructuarios de la renta mitaya).<sup>4954</sup> Para algunos de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías oligárquicas fue su naturaleza patrimonialista, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos.<sup>4955</sup>

En ese sentido, habiendo analizado la crisis de los ordenes barroco, patriarcal, estamental, señorial y mercantilista, en esta sección nos dedicamos a estudiar las relaciones etnológicas deslegitimadoras del orden patrimonial como elemento catalizador del colapso imperial, en tres sucesivos capítulos: las fracturas fiscales y la descomposición de una burocracia subordinada, las extorsiones y sobornos en la conducción de los caudales de Potosí a Buenos Aires, y la corrupción administrativa como mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local.

### **Capítulo II-G-19      Fracturas fiscales y descomposición de una burocracia subordinada.**

Índice

- P-I Tradición historiográfica en materia de crisis fiscal
- P-II Ramo de Sisa.
- P-III Otorgamiento de licencias.
- P-IV Comandancias de Fronteras.
- P-V Cabildos Eclesiásticos.
- P-VI Renta de Tributos.
- P-VII Renta de Correos.
- P-VIII Renta de Tabaco y Naipes.
- P-IX Región cuyana.

## **Introducción al capítulo II-G-19**

En este capítulo, complementario de otros capítulos,<sup>4956</sup> me he propuesto demostrar la íntima conexión existente entre la corrupción generalizada vigente en la administración colonial borbónica y los orígenes históricos del fenómeno revolucionario, uno de los causantes del desmembramiento del espacio político Virreinal. Para ello, exploramos el comportamiento de aquellos funcionarios que detentaban cargos públicos en el interior del espacio colonial y cuya tenencia tenía su origen como consecuencia de la aplicación de mecanismos patrimoniales de reclutamiento. A esos efectos distinguiremos como corrupción sólo aquellas actividades que --como el cohecho o soborno, y el desfalco, quiebra o malversación de las Cajas Reales-- violaban la confianza puesta por el público en los funcionarios.<sup>4957</sup>

El clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal que aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario, que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la Plata, se extendió no sólo a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, y los Propios y Arbitrios, ni al Situado Real, cuyas peripecias las he desarrollado en otros trabajos, sino también a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades, y la Renta de Correos, fueron durante el período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.

En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los Cabildos y otras instituciones políticas del estado colonial en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas posteriores a la centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.<sup>4958</sup>

## **P-I Tradición historiográfica en materia de crisis fiscal**

Para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y Brown (1986), la política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no habría afectado a los gobiernos municipales.<sup>4959</sup> Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".<sup>4960</sup> Más aún, para Pereyra (1924), Palacio (1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los intentos de revivir los cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento de las

gobiernos-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una de las más relevantes reformas Borbónicas.<sup>4961</sup> Sin embargo, para Socolow (1987), las reiteradas interrupciones del pago de salarios en la administración pública, luego de la Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó el espíritu de cuerpo de la burocracia colonial.<sup>4962</sup>

Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real asalariada, la burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen Borbónico, y aún probablemente luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la burocracia absolutista.<sup>4963</sup> En efecto, probablemente inspirado en las hipótesis de Jean Jaurés acerca de las consecuencias revolucionarias que en Francia habrían provocado las frustradas reformas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou,<sup>4964</sup> para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios nunca habrían sido definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través de sus sustitutos: los Subdelegados de Real Hacienda.<sup>4965</sup> Los Corregidores de Indios, funcionarios peninsulares a cargo entre otras funciones de los repartos forzosos de mercaderías en las comunidades indígenas o Pueblos de Indios, fueron justamente anatematizados por el ilustrado Virrey Manuel de Amat y Junient como "diptongos de mercaderes y jueces".

La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier, Andrien, Socolow, Peña y Webre,<sup>4966</sup> compuesta por funcionarios que explotaban rentas fiscales y mercantiles (reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar la burocracia colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos o criollos. Por el contrario, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron los que más fuertemente insistieron en la inocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la Alternativa) para combatir las oligarquías capitulares.<sup>4967</sup>

Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis sumamente cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendieron los Corregimientos de Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el desfase existente entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo creció también en grado sumo, debido justamente a la depreciación y a la baja del poder adquisitivo del salario.<sup>4968</sup> Y para Parry (1953), el intento de divorciarse del feudalismo y engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer vendibles los oficios concejiles, sino por hacerlos renunciabiles, o en otras palabras heredables, lo cual en lugar de enaltecer el mérito y el esfuerzo personal privilegiaba el linaje, la prosapia y la herencia.<sup>4969</sup> Sin embargo, para Golte (1980), la imposición del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a una clase encomendil, habría significado un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría expresado la frustración de dicho embrión.<sup>4970</sup> Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último, para Choy (1985), desde una perspectiva muy reduccionista, la venta de los oficios públicos, y entre ellos la de los Corregimientos de Indios, era una hábil política destinada a quebrar la unidad de los burgueses, incorporando a algunos de ellos, incluso a los que padecían del estigma de un dudoso origen racial y una sospechosa legitimidad, como funcionarios del feudalismo; separándolos así de aquellos otros burgueses

"...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función de minar y derribar el sistema feudal por todos los medios".<sup>4971</sup>

Por último, ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía la organización del fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación carismática y legal.<sup>4972</sup> Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.<sup>4973</sup>

Y a diferencia de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante. Skocpol (1984) es la única autora que argumenta que las presiones y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, tenían a las elites urbanas ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario.<sup>4974</sup> Pero fué Trimberger (1978), quien primero arguyó, al referirse a las revoluciones japonesa (meiji), turca (kemalista), egipcia (nasserista), y peruana (velasquista), que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.<sup>4975</sup> Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.<sup>4976</sup> Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz, en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios españoles.<sup>4977</sup> Para Sherwin-White (1982), Richardson (1987) y Lintott (1990), quienes analizan las luchas sociales en la república Romana, y para Padgett y Ansell (1993), quienes las analizan en la aurora de la Edad Moderna, las crisis fiscales provocadas por las guerras, repolarizaban las clases sociales y tentaban a los oligarcas a incursionar en campañas represivas.<sup>4978</sup>

Finalmente, para Burrow (1987), las historias antiguas de Grecia y Roma ofrecen a la crítica de la política contemporánea la herramienta o analogía histórica del llamado ciclo vital de la corrupción.<sup>4979</sup> En el caso de la América Latina colonial, para Pietschmann (1982) y Andrien (1984) el clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario.

## **P-II El Ramo de Sisa.**

Con referencia al Ramo de Sisa, recién a partir de la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1778 dicho Ramo fue incorporado a la Real Hacienda.<sup>4980</sup> El Cabildo

debía contar en dicho Ramo con los ingresos derivados de las tropas de carretas entradas a Córdoba, que transportaban cargas de aguardiente, tabaco, yerba y jabón, así como de los ingresos derivados de las arrias de mulas y vacas procedentes de Cuyo, Santa Fé y Buenos Aires, pero cuya recaudación estaba a merced de la discrecionalidad de los Alguaciles Mayores y de los Tenientes de Oficiales Reales.<sup>4981</sup> Tanto los Mayordomos de Propios como los Alguaciles Mayores eran funcionarios capitulares elegidos por los clanes familiares que monopolizaban el Cabildo de Córdoba. En cambio los Tenientes de Oficiales Reales eran funcionarios de la Real Hacienda elegidos por el Virrey. Sin embargo, y pese a su pertenencia a la Real Hacienda, dicho cargo recaía por lo general en miembros de los clanes familiares que gobernaban el Cabildo.<sup>4982</sup>

La corrupción se extendía a los ramos de la Real Hacienda, como era el caso del ramo de Sisa, y los Diezmos,

"...¿A quien se oculta en la Rioja, [se preguntaba el mismo Francisco Antonio Ortiz de Ocampo], que en el ramo de la cisa y aguardientes ha mantenido Dn José de Noroña tratos públicas con los Peñalosas, con Dn. Gabriel Sotomaior, con Dn. Miguel y Dn Basilio Moreno, todos vecinos de aquella ciudad? que él por separado ha hecho comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por los remates de Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma tercena y que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".<sup>4983</sup>

También fué el caso en Salta, tres años después, en 1802, del Comandante Diego José de Pueyrredón,<sup>4984</sup> quien según un extenso escrito,<sup>4985</sup> elevado al Virrey del Pino por un numeroso grupo de vecinos,<sup>4986</sup>

"...lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".<sup>4987</sup>

El informe en que se manifestó el repudio del pueblo Riojano por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco, elevado en 1784 por el Subdelegado de la Real Hacienda y el Ministro Tesorero de La Rioja al Gobernador de Córdoba Marqués de Sobremonte, revelaba que sus autoridades estaban persuadidas que son mal vistos los Oficiales Reales no sólo por la condición de Europeos sino por la calidad de sus empleos, consistentes en recaudar los Ramos de la Real Hacienda. Tanto se encrespaban los ánimos que los Oficiales Reales se vieron precisados "...a contenerse y no extender a lo que es debido el punto de la recaudación de los ramos de la Real Hacienda por temor que de ello pueda resultarles persecución".<sup>4988</sup> En el mismo expediente de la serie de Hacienda, donde se halla el Informe elevado en 1784 por el Cabildo de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba, se encuentra también como prueba de los hechos un pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que hemos denominado en otro trabajo "Décimas de Protesta".<sup>4989</sup> En Salta, en 1802, un numeroso grupo de vecinos,<sup>4990</sup> se quejaba del Ministro de Real Hacienda Don Gabriel Güemes Montero,<sup>4991</sup> quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero se inviernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo,<sup>4992</sup> del cual era primo hermano su propia mujer, Magdalena Goyechea y de la Corte. Alcaldías de Hermandad como las de la

provincia de Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. Doña Catalina Zambrano,<sup>4993</sup> mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estanquillero Agustín de la Iglesia,<sup>4994</sup> quien la había denunciado por la fuga de su esclavo, a quien Doña Catalina le había prestado un caballo, por cuanto "...se cree autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".<sup>4995</sup> Iglesia se había tomado

"...un asendiente sobre todos aquellos pobres hombres, que habitan el partido de Areco de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades, y echo temible a los Alcaldes Pedáneos, y al vecindario".<sup>4996</sup>

Por cuanto a fines de siglo, la Corona estaba interesada en promover exclusivamente la comercialización del tabaco cubano, combatía cualquier cultivo que se hiciera en otras regiones. Para ello la Real Renta de Tabaco llegó a constituir en la jurisdicción del Río de la Plata 12 administraciones generales, 71 administraciones particulares, y 480 tercenas y estancos.<sup>4997</sup> En sólo la ciudad de Chuquisaca existían en 1802 más de una docena de estancos de tabaco con la responsabilidad entre otras de impedir el fraude y los cultivos clandestinos.<sup>4998</sup> A juzgar por un documento de la serie de Hacienda de 1778 el tabaco que se consumía en el Alto Perú no provenía de la Real Fábrica de Sevilla, ni de la Fábrica de tabaco en rama del Paraguay, que entraba en Buenos Aires, por no ser costumbre en el Alto Perú el mascar tabaco, sino el fumar tabaco en polvo manufacturado en México y Cuba, que se remitía anualmente desde Lima.<sup>4999</sup> También se consumía, aunque menos, el tabaco en rama que se cosechaba y sembraba clandestinamente en algunas provincias del Alto Perú y Salta del Tucumán. Francisco de Paula Sanz señala en su correspondencia de 1779 que algunos hombres procedentes de Tarija habían procedido en Tucumán hacía seis años al cultivo del tabaco, por haberse restringido las siembras en Tarija.<sup>5000</sup> Para perseguir los cultivos clandestinos y restringir así las siembras, a principios del mes de abril de cada año salían del Estanco del Tabaco de Tarija para dirigirse al Pueblo de la Laguna y desde ahí recorrer durante tres meses la Quebrada de Santo Domingo de 10 a 14 hombres con un baqueano, los cuales arrancaban, quemaban, y destruían

"...la multitud de tabacales clandestinos, que regularmente ascienden a 200 o 300 mil plantas de tabaco que en diversos lugares y terrenos de dicha Quebrada se crían, y aún cultivan por algunos individuos para el fomento del contrabando".<sup>5001</sup>

Tan frecuentes eran los fraudes que a principios de cada mes de septiembre el personal del Estanco de Chuquisaca debía volver a salir para practicar la visita de las administraciones provinciales de Yamparaes, Oruro, Sinti, y Tomina, inspeccionar las cuentas de sus administradores y estanqueros, tomar razón de sus existencias, y recoger y conducir los caudales de la Administración General.<sup>5002</sup> También se perseguían los cultivos clandestinos en la provincia de Salta del Tucumán. José Tomás Sánchez, Administrador General del Real Estanco de Salta informaba a la Dirección General que José Mariano Soloaga,<sup>5003</sup> Administrador Principal en Tucumán, solicitaba se le abonaran \$2253

"...impendidos en la laboriosa operación que verificó para destrozlar, y aniquilar las siembras clandestinas de tabaco, que con detrimento de los intereses del soberano se practicaban en los bosques, y serros de aquella jurisdicción",<sup>5004</sup>

### **P-III El otorgamiento de licencias.**

Respecto de las licencias para la carga y salida de los barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón y expendio de tabaco y naipes, estas también provocaban severas crisis entre los cabildos locales y sus Gobernadores. En cuanto a la expedición de licencias para la carga y salida de barcos y el beneficio de yerbales, el Gobernador-Intendente del Paraguay, se reservaba, en su condición de Comandante de Armas, la facultad de dar estas licencias, así como la de ordenar las Visitas de Barcos y Balsas en que se conducían los efectos comerciables de la Provincia. Dicha reserva la fundaba en 1784 el Gobernador Pedro Melo de Portugal en que las Visitas eran negocio militar "...porqué los peones que sirven en [la carga de] dichas embarcaciones son de las tropas milicianas de esta Provincia".<sup>5005</sup> Con sólo el pretexto de que eran soldados los peones que cargaban las embarcaciones, las autoridades les exigían traer certificados de sus Jefes respectivos de que no hacían falta en sus respectivas guarniciones. Pero como la tramitación de los certificados se demoraba por las distancias que los peones debían recorrer para obtenerlas, el Teniente Asesor Letrado Dr. Mariano Lorenzo Grambel alegaba, en conflicto con el Teniente de Gobernador Manuel García Barrazábal,<sup>5006</sup> que esto era "...coartar la libertad de comercio impidiendo las embarcaciones que están prontas para viajar".<sup>5007</sup> Finalmente, Grambel recurría al Virrey Marqués de Loreto para que declarare que el uso y ejercicio de dichas facultades no correspondían al Gobierno Militar

"...sino al político y económico inherentes a las cuatro causas de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, y que no corresponde al Gobierno Militar sino al Intendente según lo declara el artículo 6 de la Real Ordenanza".<sup>5008</sup>

Tres años después, en 1788, el nuevo Teniente Asesor Letrado, Dr. Miguel Gregorio de Zamalloa,<sup>5009</sup> en oficio dirigido al Gobernador Joaquín Alós, le hacía presente cuán perjudicial era en el Paraguay "...la separación de mandos [civil y militar]".<sup>5010</sup> Sin embargo de ser tan claro que las licencias para la carga y salida de los barcos era un asunto meramente de Policía, en que igualmente se interesaba la Real Hacienda, el Comandante de Armas le disputaba al Teniente Asesor Letrado esta regalía "...con el pretesto de que la Visita de la Gente de la tripulación, le era privativa a él, sucediendo lo mismo con las licencias de los Beneficios de la Yerba".<sup>5011</sup> Estas y otras discusiones obstaculizaron la función de Justicia, al extremo de embarazar "...las más de las veces el uso de su Jurisdicción, con el pretexto de ser Milicianos todos los vecinos de esta Provincia, y gozar del fuero militar fuesen o no de los casos comprendidos en él".<sup>5012</sup> Este mismo método siguió el Teniente Gobernador García de Barrazábal con el Teniente Asesor Zamalloa, al extremo de ordenarle al Administrador del Ramo de Guerra le diera a él como Teniente Gobernador y no al Teniente Asesor los recibos que solía dar a los Beneficiarios de los yerbales.<sup>5013</sup>

#### **P-IV Las Comandancias de Fronteras.**

Con relación a las Comandancias de Fronteras, un extenso escrito,<sup>5014</sup> elevado al Virrey del Pino en 1802 por un numeroso grupo de vecinos de Salta,<sup>5015</sup> daba cuenta de serios casos de corrupción. Estos fueron cometidos por los Comandantes Diego José de Pueyrredón,<sup>5016</sup> y Juan José Cornejo,<sup>5017</sup> pues a juzgar por dicho escrito, el primero de los Comandantes mencionados era "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".<sup>5018</sup> A más de ello, tiene Pueyrredón "...a

los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,<sup>5019</sup> proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su comando".<sup>5020</sup> La presencia de estos indios, era para los firmantes del escrito, perjudicial para la frontera, "...por los conocimientos y vaquía, que adquieren para las invasiones y alianzas que hacen con este motivo con los [indios] reducidos".<sup>5021</sup> Dicha provisión de mano de obra indígena le valía a Pueyrredón "...más que el salario de 600 peones anuales, y las excesivas raciones que tiene de carne, vizcocho, tabaco, y yerba".<sup>5022</sup> Tenía además Pueyrredón "...la vergonzosa grangería del vizcocho para racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior calidad, él lo da como Abastecedor, de inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce reales abonándoselo el Ramo a 18 reales".<sup>5023</sup> Asimismo, Pueyrredón tenía "...interés en el abasto de la carne".<sup>5024</sup> Pero más escandaloso, era el tabaco "...que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".<sup>5025</sup> En cuanto al Comandante Cornejo, era dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. Medeyros".<sup>5026</sup>

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,<sup>5027</sup> mujer del Tesorero Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero, recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".<sup>5028</sup> Con el servicio de los soldados, presidiarios e indios infieles, Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".<sup>5029</sup> Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de los enemigos, hace por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones de que es Abastecedor con su hermano Don Antonino".<sup>5030</sup> Si bien la revista mensual de los Fuertes del Río del Valle era practicada por un Comisionado, como éste era "...amigo y pariente de Cornejo, jamás se llegará a notar la menor falta de soldados que tiene fuera del real servicio, y en el [servicio] de su suegro Dr. Medeyros".<sup>5031</sup> A más de los soldados fijos, llamados ordenanzas, que tenía Medeyros, como el Reglamento de Sisa no se los permitía, "...no [a]parecen como ordenanzas, sino como Partidarios [pagados de la partida del Ramo de Sisa], y puestos en lista de los Fuertes".<sup>5032</sup>

## **P-V Los Cabildos Eclesiásticos.**

Respecto a la corrupción reinante en los Cabildos Eclesiásticos, bastaría con señalar como botón de muestra que el encubrimiento de la barraganía de los integrantes de dichos Cabildos era moneda corriente. El caso más descollante fue el que se suscitó en Córdoba a fines del siglo XVIII por el Obispo Angel Mariano Moscoso acerca del concubinato del Chantre José Lino de León.<sup>5033</sup> Si bien Bruno (1967) menciona el caso bajo la caracterización de interposición, elude definirlo con trazos más gruesos.<sup>5034</sup>

## **P-VI La Renta de Tributos.**

Con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fué el del Corregidor de la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más de \$7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.<sup>5035</sup> También fué famoso el caso del Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,<sup>5036</sup>

quién con la complicidad de los Tesoreros José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de Carabaya en provecho propio, en el orden de los \$50.000.<sup>5037</sup> Otro caso muy sonado fue el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de Grandidier,<sup>5038</sup> fué culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en \$10.714.<sup>5039</sup> Y otro caso fue el de Arpita, cuyo Hilacato fue procesado por usurpar los tributos.<sup>5040</sup> Pero también hubo otros casos que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo Gregorio de Castilla,<sup>5041</sup> y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñoz Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por \$84.968;<sup>5042</sup> la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por \$5.100;<sup>5043</sup> la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio,<sup>5044</sup> la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de \$31.528;<sup>5045</sup> la de la Renta de Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por \$8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por \$1.107.<sup>5046</sup>

En el caso de la Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente desfalco de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".<sup>5047</sup> En el caso de la Caja de Carangas, Muñoz Villegas, confesaba que la quiebra fue el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluido un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".<sup>5048</sup> A su vez, la causa por la cual se vió obligado a trabajar minas e ingenios fué la necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".<sup>5049</sup> En el caso de la Caja de Potosí, la gravedad del quebranto no estribaba tanto en el monto sino en la naturaleza de la persona involucrada en el desfalco. Aoíz era un porteño, viejo funcionario de la administración colonial, que había sido Alguacil Mayor de las Reales Cajas de Potosí en 1779, Contador Mayor en 1781, y Ministro Honorario del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires en 1794, hijo a su vez de quien había sido Contador de las Cajas Reales de Potosí y de Tomasa Larrazábal y Avellaneda, y yerno más luego de quien fuera Corregidor de Potosí, el Coronel José Antonio de Otálora, integrante de una de las familias más prominentes del Buenos Aires colonial. Lo particular del caso es que se hubiera confiado las Cajas Reales de Potosí a quien no gozaba de antecedentes morales intachables. Esta tela de juicio se confirma si tenemos en cuenta que en 1776 la propia madre de Aoíz manifestaba que "...cuando él estuvo viviendo a mi lado hice de él más confianza de la que debía".<sup>5050</sup> En efecto, Doña Tomasa Larrazábal puso el manejo de la Casa en su hijo Fermín y llevada de aquel concepto que había formado de su recto proceder no dudó en firmarle muchos documentos a la mera narración que le hacía de su contenido. Pero Doña Tomasa lo acusa que

"aprovechándose de mi sencillez ha tenido el atrevimiento de sorprenderme, faltando a todas las reglas de la buena fé...pues Dios save muy bien que jamás e pensado confirmarle los pagarés que hacen caveza en los autos, ni nunca he visto semejantes documentos sino cuando se me mandaron reconocer, y así sostengo, y sostendré siempre que yo no he firmado tales vales".<sup>5051</sup>

El desfaldo practicado por Aoíz en Potosí consistió en la desaparición del azogue, como consecuencia del "hecho escandaloso de la excavación del Almacén". La criminalidad del acto se fundaba en haber procedido Aoíz a la ejecución de una excavación o boquete, clandestina y arbitrariamente, sin licencia del gobierno, "...exponiendo como expuso a desplomarse todas las paredes del edificio de la Real Caja con el forado de cinco varas que se había dado de profundidad desde el piso superior del suelo a dicho almacén".<sup>5052</sup> Entre las habilidades que debía poseer un azoguero si quería prosperar en el negocio minero era el de mantener fluidas relaciones (sobornos en forma de gratificaciones) con quién detentare el azogue, ya fuere el Banco de San Carlos o las Reales Cajas. Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez nos revela en el ignorado documento de 1802 que "...muchos azogueros sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del que necesitaban para tenerlo guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que después no podían pagar a los debidos plazos".<sup>5053</sup> Este abuso en el aprovisionamiento de azogue llevó a que algunos pocos azogueros se endeudaran con el Banco de San Carlos muy por encima de lo que le correspondía al giro de su producción de metal. Con respecto al Gremio de Azogueros Cañete alegaba, precabiendo acerca de las nocivas consecuencias que la corrupción reinante en Potosí podía traer:

"...no tanto por la dificultad de la cobranza, a unos sugetos que nunca han sido tenidos por poderosos, quanto por los grandes abusos que fácilmente pueden introducir contra el buen servicio de la mita, y contra el buen orden de las Minas con las pretensiones ambiciosas, que son consiguientes a tan grande extensión de empresas, después de la prepotencia que han adquirido sobre todos los demás Azogueros para hacer valer su voz por la del Gremio entero a favor de sus intereses particulares".<sup>5054</sup>

Los monopolios que en ese entonces hegemonizaban la producción de plata era lo que le preocupaba a Cañete, de modo que su posición no era fruto de un resentimiento, como lo presume Buechler (1977), o de la defensa de los dueños de los ingenios como lo sugiere Villava, sino producto de una honda meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí. Como consecuencia del incumplimiento de las Reales Ordenanzas

"...dos o tres azogueros, reúnen entre sí, una mitad de la fuerza de todo el Gremio...Ahora mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Bargas y Azcárate, y siguen con la mira de abarcar los que vacaren en adelante en teniendo abundancia de Mita: sin que parezca extraño el poder pronosticar que al cavo de algunos años vendrá a parar toda la Rivera en solas seis o siete manos".<sup>5055</sup>

En cuanto a los auxilios (subsidios) semanales que los azogueros recibían de manos del Banco de San Carlos, Cañete agregaba:

"...Ya he dicho que en las quince semanas debe percibir Bargas 30 mil pesos, Orueta 24 mil pesos, y Azcárate 12 mil y más, y entre los tres cerca de 70 mil pesos, que es casi una mitad de los 200 mil".<sup>5056</sup>

De resultas de la protesta de Cañete, el gremio de azogueros acordó finalmente en Enero de 1804 exonerar de la contribución de un real por marco a los mineros provincianos. Sin perjuicio de dicha exoneración, la deuda acumulada por el Gremio de azogueros para con la Real Hacienda le hacía pronunciar a Cañete un año después que

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el lujo escandaloso de sus casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".<sup>5057</sup>

## **P-VII La Renta de Correos.**

Respecto a la Renta de Correos, ella tampoco le iba a la zaga en materia de desfalcos y defraudaciones. Como los Administradores designaban a sus oficiales subalternos, mozos de oficio, maestros de posta, correos conductores y demás empleos inferiores, cualquier irregularidad producida por estos últimos recaía en los primeros. Un expediente de la serie de Hacienda nos revela que el Administrador de la Estafeta del Correo de Sicasic, Francisco Medrano, fué acusado en 1796 de defraudar la caja de la administración.<sup>5058</sup> El Administrador del Correo de Oruro, Don Manuel de Aurrecoechea, también fue acusado de estafar a su propia oficina.<sup>5059</sup> Aurrecoechea había adelantado en 1777 de las rentas del Correo \$72.000 al Alférez Real Diego Antonio Flores, para el trabajo de sus minas e ingenios. Como el Interventor en la Administración de los Correos de Lima, Don José Álvarez Nava había proyectado que los productos de los Correos de Cochabamba y La Plata se llevasen a Oruro, y que en dicha Villa se retuviesen también los caudales del Comercio de Potosí, que se acostumbraban remitir a Lima por el mismo Correo, "...para que comprando marcos y fundiendo barras tuviese la Renta [de Correos] la utilidad que dejan", sus subalternos en dicha administración implementaron el Proyecto a su manera. Advertido el Administrador Principal de Correos de Lima Don José Antonio de Pando del escándalo que estas malversaciones podían desatar recurrió ante el Tribunal de Cuentas de Lima. Sustanciado el caso ante el Tribunal fueron todos sorprendidos

"...con dolo y mala fe, porque sólo constaba que Aurrecoechea había usado de la plata de la Renta, silenciando que no es de ella, sino de Encomiendas, o usurpada a Luna [Juan Ruiz Luna era el Conductor aprobado por el Gobierno de Lima para transportar los Caudales de las Cajas desde Carabaya y las demás Cajas hasta Potosí] y que la tenía embebida en las minas e ingenios de Flores, lo que tampoco es así porque quando la invirtió en estas Labores y trabajos, ya hacia más de un año que él lo manejaba como propio",<sup>5060</sup>

Asimismo, la Bula de la Santa Cruzada había sido en el Alto Perú objeto de abusos sin número. Las bulas se vendían por vía de la Santa Cruzada y podían ser de latrocinios o de composición. Las primeras se adquirían para que los fieles pudieran comer productos lácteos en tiempos de Cuaresma y podían valer entre \$1 y 2\$ cada una. Las segundas se compraban con el fin de restituir los daños y perjuicios que el comprador podía haber ocasionado en su vida a terceros, y podían costar desde 2 reales hasta \$30 cada una para difuntos, y desde \$1 hasta \$60 para vivos. Por lo general, las bulas se adquirían en artículo mortis y se consignaba en testamentos y codicilos. Por ejemplo, Juan de Peñarubia, conocido azoguero de la Ribera de Potosí y patrono del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes ordenó en su testamento que le comprasen 200 bulas de composición de a 12 reales cada una.<sup>5061</sup> La recaudación procedente de esta subasta colectiva solía también provocar tentaciones de toda especie. Pablo Tarabello y Francisco Ruiz de Sorzano, recaudadores de la Bula en Oruro, fueron acusados en 1802 de defraudar sus rentas.<sup>5062</sup> Aparentemente, Lamberto de Sierra, un conocido funcionario que se había enfrentado con

Cañete, también tuvo experiencia en estos casos, pues había incriminado a Isidro José de Escarza, Recaudador de la Bula de la Santa Cruzada, por haber hecho un uso indiscriminado de los caudales reales. Escarza alegaba que "prevalido de la retardación de la entrega" había sido autorizado por el propio Sierra para poner "en giro" dicho caudal, siempre "...que estuviera seguro y pronto el dinero para cuando llegase el caso de su entero".<sup>5063</sup> Escarza confesaba asimismo por escrito que

"...el deseo de adelantar mis intereses, me hizo entrar en el laboreo de una mina que ofrecía superabundantes ventajas en un cerro llamado de Andacava distante cinco leguas desta Villa, en la que al principio de este trabajo logré sacar algunas piñas que introduxe en este Real Banco, y siguiendo con la explotación me pintó tan mal, que después de cerca de once meses de trabajo y una habilitación de más de nueve mil pesos, no me fue posible sacar producto alguno, ni resarcir siquiera los gastos semanales que hacía".<sup>5064</sup>

Si bien los casos más escandalosos de defraudación fiscal se registraron en las Provincias del Alto Perú, también se registraron casos graves en las Gobernaciones-Intendencia del Tucumán y del Río de la Plata. Era usual entre el vecindario de la época atribuir el origen de la acumulación de capital de los grandes comerciantes a la connivencia fraudulenta con los altos funcionarios reales. Es conocida la corrupción general en que estaba sumida la Corte de Madrid en lo que se refiere a la distribución y venta de las designaciones, ascensos y destinos en la burocracia administrativa civil, militar y eclesiástica colonial. Por cierto, entre los cargos más apetecidos estaban los corregimientos y los grados militares. Estos últimos eran duramente disputados y altamente cotizados, debido al privilegio del fuero que les otorgaba la condición de militar, esencial para zafarse de cárceles y embargos en caso de quiebras fraudulentas.

Una vez en funciones, los agraciados debían resarcirse de su inversión y satisfacer a los acreedores y fiadores que les hubieren financiado la adquisición del cargo, por lo general, fuertes comerciantes locales. En el caso particular de la gobernación de Buenos Aires, Apolant (1966) abunda en detalles referentes a la tramitación de dichos cargos en la Corte.<sup>5065</sup> El Gobernador Agustín de Robles no fue una excepción al respecto, y tuvo como su fiador al más importante proveedor de mulas del Alto Perú, el General Miguel de Riblos. Entre las maniobras fraudulentas más comunes cometidas por estos funcionarios figuraba la morosidad en el pago de los salarios de la oficialidad y la tropa acantonada en el fuerte de Buenos Aires, lo cual les permitía especular con el efectivo mientras durara la misma.<sup>5066</sup> En el juicio de residencia que a los comienzos del siglo XVIII se le iniciara al ex-Gobernador de Buenos Aires Agustín de Robles, Pedro Costanza (apoderado de Francisco Rivera, vecino de Madrid, en quién Mateo de Ayora había cedido una obligación otorgada por el ex-Gobernador Robles) acusa a Miguel de Riblos que no fue prodigalidad el haberse obligado a pagar por Robles. Con el fruto de las ventas de mulas en el Alto Perú, y merced a la vista gorda del Gobernador de Buenos Aires y los oficiales del Presidio bajo sus órdenes, Riblos había podido adquirir durante toda la gestión de Robles mercadería foránea en la Colonia del Sacramento, la que una vez introducida ilegalmente engrosaba sus arrias al Alto Perú. En su descargo contra las acusaciones de Costanza, Riblos refiere que

"...respecto de que cuando vino [Robles] a gobernar estas provincias me hallaba sin medios sin casas y con muchas deudas y que desde el tiempo que [Robles] me hizo arbitro de sus dependencias e buscado mucho caudal he edificado Palacios y

aumentado las haciendas de campo que tenía perdidas, de manera que sobre hauer sido siempre mis tratos tan caros son tantos los débitos que tengo que cobrar en esta ciudad y en el resto destas Provincias que son muy pocos los que no me deben, en medio de haber dejado a muchos sin casas en que vivir con la mano que tenía de dicho Excelentísimo Señor, de donde saca la razón de la obligación que tenía de pagar por él".<sup>5067</sup>

## **P-VIII La Renta de Tabaco y Naipes.**

Pero de todos los ramos de la Real Hacienda la piedra del escándalo que generara un extendido repudio hacia los funcionarios españoles o porteños era, indiscutiblemente, la Renta de Tabaco y Naipes. Este ramo, como es sabido, fue una creación borbónica. Si bien en teoría el tabaco contaba con tarifas oficiales, en la práctica, los administradores, tercenistas, fielladores, y estaquilleros del Estanco de Tabaco y Naipes imponían, discrecionalmente, el precio con que forzosamente se debían repartir dichas mercancías.

En ese sentido, fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los Corregidores de Indios por sus sospechosas relaciones con los Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el Corregidor de la Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fue acusado de estar coludido con Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano, cerrándole los estancos.<sup>5068</sup> Más luego, en oportunidad de la Rebelión de Tupac Catari, García de Prado, como consecuencia de la nefasta reputación adquirida en el ejercicio de su cargo, fué ajusticiado por los indios.<sup>5069</sup> También fueron famosas en su momento (1790-95) las acusaciones que recayeron sobre el Administrador General de Tabaco y Naipes de Puno, Miguel de Echenique y su cuñado, el Contador Interino Francisco Vásquez, por una suma que sobrepasaba los diez mil pesos plata.<sup>5070</sup> Aparentemente también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones impuestas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. En La Rioja, en 1781, el Administrador de la Renta de Tabacos y Capitán de Milicias José Antonio Mercado,<sup>5071</sup> fue arrestado bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas.<sup>5072</sup> Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera del Río del Valle.<sup>5073</sup> Y veinte años más tarde, la corrupción continuaba, pues el Sub-Inspector de Real Hacienda, cumpliendo las funciones de Gobernador de Córdoba, incomodado con las repetidas quejas contra el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,<sup>5074</sup> propuso en 1799 al Comandante Dn. Juan José de Villafañe y Dávila,<sup>5075</sup> se hiciese cargo de desempeñar la administración de Tabacos y tenencia de Oficial Real. Para ello se preguntaba en 1799 Francisco Antonio Ortiz de Ocampo,<sup>5076</sup> con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Zavaleta,

"...¿Acaso hay cosa más pública y notoria que el comercio mantenido por Dn José [Noroña] en compañía de Gervasio Agüero de los tabacos por algunos años interesados por mitad en las utilidades? ¿Por ventura se ignora en la Rioja que el tabaco de oja que se remitió de esta Capital para expendio en la misma tercena y en la jurisdicción, que algunos particulares entre ellos Juan Ángel Corso quien con título, que le confirió Dn. José Noroña bajó al partido de los Llanos, e hizo la venta

por cueros a maior precio que el de las tercenas, siendo constante también, que el título se le quitó a Corso por el tercenista del partido Dn. Juan de la Vega?<sup>5077</sup>

El dinero que entraba en caja por rendimientos de una administración de tabaco y naipes era aquel que entregaban los expendedores por ventas de los efectos que recibían. Mensualmente, los tercenistas y estanquilleros presentaban sus productos con un estado o cuenta general que detallaba lo que recibieron, lo que habían vendido, y las existencias que les quedaban. Sobre las ventas que hubieren tenido se les hacía la deducción del premio que cada uno disfrutaba, y en aquel acto mismo se les pagaba. Todo esto se hacía a presencia de los Libros de oficina y de la cuenta que llevaba el expendedor. Concluido el año, cada expendedor presentaba su cuenta, la cual debía abrazar los efectos recibidos y las ventas hechas en los doce meses del año. Tal era el poder discrecional de los estanquilleros, que en 1799 en un pago (distrito) de la provincia de Buenos Aires tan próximo a las rutas comerciales como San Antonio de Areco, Doña Catalina Zambrano, viuda de Juan Gonsález, denunciaba que el estanquillero de Areco, Agustín Iglesia, "...se ha echo temible a los alcaldes pedáneos...y se creé autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".<sup>5078</sup> Según Doña Catalina, el estanquillero Iglesia se ha tomado un ascendiente sobre todos aquellos "...pobres hombres que habitan el partido de Areco, de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades".<sup>5079</sup>

También hallamos esta clase de discrecionales funcionarios del Estanco entre los mismos administradores. Entre 1772 y 1774 encontramos que el Coronel Manuel Castro, nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fue hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada.<sup>5080</sup> Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas.<sup>5081</sup> Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2.600. Juan Manuel de Castro y Carreño,<sup>5082</sup> su hijo, que luego fuera Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma. Injusta porque no podía quedar debiendo su padre lo que los administradores particulares y estanquilleros de la provincia de La Rioja Fabián Gonsález y José Antonio Mercado habrían defraudado.<sup>5083</sup> Si bien era cierto que Castro los había nombrado y debían haber dado fianza de sus administraciones, su hijo alegaba que "...es constante la especie de conspiración que se tramó en aquella provincia para no admitir dicho encargo y frustrar por este medio el establecimiento del Estanco, de suerte que todos se excusaban de aceptar dicha comisión".<sup>5084</sup> Es por ello que su padre se vio obligado, para no dar lugar al boicot, a relevar de las fianzas a aquellos que "...sin este gravámen se querían hacer cargo de la administración,...sin que jamás la Dirección General le reprobase un adbitrio".<sup>5085</sup>

Los tercenistas y los estanquilleros de la Real Renta de Tabaco y Naipes contaban en tiempos de la recolonización borbónica con más poder que los Cabildos, lo cual confirma lo aseverado por Palacio (1954) en su célebre polémica con la historiografía liberal. Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas de Catamarca no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires.<sup>5086</sup> En el caso concreto de la Administración dirigida por el Coronel Manuel Castro, ésta gozaba de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco

estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria, emanada de los funcionarios capitulares locales o de las Diputaciones del Consulado. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porqué los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".<sup>5087</sup> También era injusto que Urdaneta declarara que lo que Castro debía cobrar por concepto de su administración era del 6% del producto de la Renta, compuesto por el 4% en calidad de salario y el 2% restante por vía de gratificación. Siendo estos porcentajes manifiestamente menores a lo dispuesto por el Virrey de Lima en el título por el cual se lo nombró, su hijo Juan Manuel reclamó se diera por nula la ejecución librada. En el despacho de su nombramiento expedido el 11 de octubre de 1769 se especificaba que por compensativo se le asignara a Castro el 10% del tabaco en polvo y en rama que se vendiere al por mayor en las tercenas, y el 5% de lo que se vendiere al por menor en los estanquillos.

Sin embargo, si bien era cierto que en las Ordenanzas Generales del Estanco se prescribía que los Administradores Particulares debían percibir el 10% de lo que producía el tabaco en polvo, no lo era así con respecto al tabaco en rama, para el cual se establecía sólo el 4%. Sin duda, para Juan Manuel, el Virrey quiso premiar a su padre "...compensándole con el aumento del 1% sobre el 4% de esta especie".<sup>5088</sup> En conclusión, la asignación establecida por el Contador Urdaneta, consistente en un 4%, más un 2% en concepto de gratificación, cuando lo que se establecía en las Ordenanzas era el del 10% más un 5%, era "repugnante" por cuanto "...la gratificación era precisamente aquello que se le da a alguno sobre y además del sueldo o salario que debe percibir".<sup>5089</sup> Pero el caso de la resistencia que ofrecían los vecinos de La Rioja al Real Estanco no termina con el caso del Coronel Castro. Como es sabido, con la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, La Rioja dejó de estar políticamente subordinada a Salta, para pasar a depender de Córdoba.<sup>5090</sup> Cuando en 1781 los Milicianos enviados desde Córdoba y Buenos Aires para reprimir las Provincias del Perú, se apartaron del camino y entraron "tumultuariamente" en La Rioja lo primero que hicieron fué apropiarse del Estanco para ponerle al tabaco el precio que quisieron.

Pero con estas quiebras y abusos no terminan las desventuras de la Renta del Tabaco. El Gobernador Intendente de Córdoba Nicolás Pérez del Viso y el Administrador interino de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba, Don Manuel de Alfaro, fueron procesados en 1803 por el desfaldo descubierto en el Estanco Real. Desde abril de 1799 en que Alfaro se hizo cargo del Estanco, por fallecimiento del anterior Administrador Don Rafael María Castellanos, hasta Diciembre de 1802 en que Alfaro cesó su manejo por suspensión de su empleo, embargo de sus bienes, y arresto de su persona, la administración produjo \$101.727.<sup>5091</sup> Deducido los gastos, sueldos, remesas y demás erogaciones que llevaron los tres años y nueve meses de la administración debió tener Alfaro en caja \$38.340. Mas no habiendo entregado al Comisionado Martín José de Goycoechea más que \$13.096, habían resultado de descubierto \$25.244. Alfaro quiso cubrirse con la excusa de haber sido él mismo quien denunciara el descubierto de \$21.979. Pero los denunciantes Agustín de Olavarrieta, Vicente Caudevilla y Escudero, y Rufino de Cárdenas advierten que su delación no fue hecha sino después de haberse descubierto la falla por el recuento y tanteo que "...a consecuencia de nuestras prevenciones hizo en aquella administración el Gobernador- Intendente interino Don Nicolás Pérez del Viso", de modo que su delación "...lejos de ser libre y espontánea, fue sin disputa coactada por la sorpresa de un recuento

que no esperaba".<sup>5092</sup> La Comisión dada a Goycochea para visitar el Estanco de Córdoba fue reservada, "...su marcha desde esta capital a la de Córdoba más precipitada y violenta que la de un correo", al extremo que Alfaro confiesa que lo tomó de sorpresa.

Todos los testigos presentados fueron contestes en señalar que el Gobernador Intendente Pérez del Viso "...aunque venía a practicar las visitas en algunas ocasiones, unas se contaba el dinero y otras no, y que luego pasaba a la Contaduría en donde presume firmaba los estados, y que en otras ocasiones sin que viniese a esta administración se los llevaba a firmar".<sup>5093</sup> Como la obligación periódica e insoslayable de los funcionarios superiores era visitar mensualmente a los funcionarios subalternos y tener que abrir las Cajas Reales con tres llaves distintas, depositadas en diferentes funcionarios, solamente con una complicidad dolosa se podían superar los obstáculos burocráticos para quien quisiera delinquir. Respecto a la connivencia del Administrador con el Gobernador de Córdoba todos los testigos presentados fueron unánimes al afirmar que Alfaro ofrecía frecuentes banquetes a los que asistía el Teniente Gobernador Intendente Nicolás Pérez del Viso. Y cuando los testigos denuncian que la casa de campo donde Alfaro ofrecía sus banquetes la compró al Teniente Gobernador, se puede entender porqué el Administrador del Estanco "...mantenía en su poder dos llaves de dicha Caja, una que correspondía a él, y la otra al Sr. Teniente Gobernador".<sup>5094</sup> Más aún, cuando los testigos concuerdan que el Administrador del Estanco de Tabaco solía habilitar con tabaco, cigarrillos y naipes a pulperías y billares, sin estar obligado a rendir cuentas, y otro testigo declara "...que el mismo Alfaro le previno a el declarante que hiciese la vista gorda en cuanto a los cigarrillos de contrabando que se vendían en las pulperías", se sobreentiende que la impunidad reinante era tal que no puede sorprender que el fisco fuere defraudado, y los administradores reales pudieren recuperar con creces el caudal desembolsado en la adquisición del cargo, para el cual también prestaban cuantiosas fianzas. Con el fin de deslindar responsabilidades Alfaro culpó del desfaldo al Tercenista y Fiel de Almacenes de la Administración, Don José de Castro, a quien le acusa de tener malos modos para vender, de tener compañía con su cuñado Dámaso Piedrabuena para el expendio en Río Cuarto del mejor tabaco de la Tercena, de vender por encima del precio de tarifa, así como de hacer entrar al peón que robaba la Tercena por la ventana.<sup>5095</sup> Si bien Castro niega los cargos, se contradice al reconocer que "...me hice cómplice en su delito por apaciguar algún remordimiento, y conocer el raro modo con que [Castro] obraba".<sup>5096</sup> Esto último no pudo ser de otro modo que "...o tomando parte de lo que Alfaro robaba, o robando libremente con el beneplácito de éste".<sup>5097</sup> Acreditaba Castro sus descargos, hechos obviamente sin abogado alguno por confesada falta de medios, con el argumento de que "...yo nunca le he ofrecido la llave que estaba en mi poder,...pues no necesitaba hacer entrar al peón por la ventana con traer mi llave,...pero quise averiguar el raro modo con que extraía los tabacos".<sup>5098</sup> Amén de Castro, el Contador Interventor Alexo Antonio Gil y Planzón, también fue hallado cómplice del desfaldo.<sup>5099</sup> Por haber Gil llevado libros, sentado partidas, recogido documentos, formado estados y cuentas, y haber prestado su intervención en todos los actos y operaciones de cuenta y razón, debió haber reclamado o protestado lo que a él le correspondía. Gil podía ignorar lo que se extraía fraudulentamente del almacén y de la caja, y aún podría no saber igualmente si se introducían o no los caudales y efectos que debían custodiarse, pero lo que no podía ignorar era que los recuentos mensuales y anuales no se hacían, y que aún cuando uno u otro se practicase, "...era ilegal y vicioso pues jamás se contaban las existencias".<sup>5100</sup> No terminaron ahí las desventuras de Alfaro pues al poco tiempo fue nombrado Interventor de la Renta de Tabacos de Buenos Aires. En su nueva gestión Alfaro dio también lugar a otra quiebra,

cuya investigación fue posible merced a la labor de Martín José de Goycoechea, como Comisionado del Visitador Diego de la Vega.<sup>5101</sup>

También se extendió la fiebre defraudadora a la provincia de Salta. Cuando en 1806 el descubierto (saldo deudor) del tercer clavero de Arca y Almacenes de la Real Renta de Tabacos de Salta, apellidado Riestra, llevó a la quiebra a su Administrador José Tomás Sánchez, se comprobó que éste último, so pretexto de la "afabilidad y buen corazón" de Riestra, practicaba con él una suerte de favoritismo al ocultarle a la Dirección de Tabaco y Naipes, en la respectiva foja de servicios que le presentaba anualmente, su "carácter poco precavido y afecto a bebidas espirituosas". Amén de la desigual foja de servicios armada por Sánchez en beneficio de Riestra (no ocurriendo lo mismo con los demás estanqueros) aquel lo eximió de prestar las debidas fianzas "...porque según él fue preciso dispensárseles con concepto a la fama de honrados que tenían, a la dificultad de prestarlas, y a la necesidad de facilitar expendedores en los comienzos del establecimiento de esta Renta".<sup>5102</sup> También fue encontrado Sánchez en 1808 responsable por la quiebra ocurrida en el pasado al Administrador Principal de Tucumán José Manuel Soloaga en la suma de \$7.598.<sup>5103</sup> Este último, que era natural de Buenos Aires,<sup>5104</sup> estaba obligado a remitir a la Administración General de la Renta en Salta "...los productos de su Administración en ciertos y determinados períodos, tan precisos y exigentes que por ningún motivo debió Sánchez dispensarlos".<sup>5105</sup> Como Soloaga no tenía sueldo fijo y contaba sólo con el contingente del 7% de las ventas mayoristas que se practicaban en la Tercena principal, y el 2% sobre el remanente de las ventas practicadas en las Tercenas subalternas, tomó el recurso de ir valiéndose de los productos de la Administración para subvenir así a sus urgencias.<sup>5106</sup> El monto de la falla o quiebra, fue tomada por Soloaga

"poco a poco para comer y vestir muy frugal y casi indecentemente, también lo es por su propia exposición que con el objeto y deseo de cubrir estas fallas y consultar a la conservación de su buen nombre, entró en algunos proyectos que habiendo tenido mal éxito a pesar de sus meditaciones, le doblaron el descubierto".<sup>5107</sup>

Si bien Sánchez estaba autorizado para hacer comparecer a Soloaga, y aún para suspenderlo, está claro por lo que surge del expediente que ninguno de estos recursos se tomaron. Por todo ello, los fiscales Olavarrieta, Caudevilla, y Cárdenas concluyen en 1808 que:

"...Si Sánchez por su desidia o condescendencia usó con Soloaga de una indulgencia tan contraria a su deber: si autorizado como estaba para pedirlos de un modo que no lo hizo, debe inferirse que los inicuos atentados de Soloaga traen su origen de la tolerancia de Sánchez siendo por lo mismo este tan responsable como aquel del descubierto indicado".<sup>5108</sup>

Pero pese a haber sido suspendido Soloaga en su oficio de Administrador, por sospechas de fraude, años después se lo habilitó nuevamente, oportunidad en la cual, según lo refiere el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo "...se alzó con 20.000 masos de tabacos y dinero de la Renta, con el aparentado pretexto de ponerlos en giro para llenar el descubierto de la misma Renta".<sup>5109</sup> Más aún, hallándose del todo fallido y quebrado, Soloaga "...se valió de la autoridad del empleo para levantar peonada y capataces, y correr toda la jurisdicción del Tucumán para que le fiasen ganados los Hacendados, y habiendo malogrado este acto de sorpresa, pagó esta expedición con el caudal de la Renta".<sup>5110</sup> Asimismo, abroquelándose siempre en la autoridad que le confería la Renta de Tabacos, Soloaga emprendió varias malogradas expediciones a la jurisdicción de Santa Fé y

Abipones, en busca de ganado vacuno, mular y yeguarizo, así como de algodones "...para que le fien el total, costeando una parte con el caudal de la misma Renta".<sup>5111</sup> También afirmaba Barón que Soloaga había engañado a más de 400 cosecheros "...asegurándoles que tiene licencias del Rey para la siembra de Tabacos en toda la Campaña, y ha trabado concierto de que le den la mitad ya beneficiado y marcado".<sup>5112</sup> Pero pese a esta producción clandestina de tabaco que se exportaba a Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, desde el mes de octubre de 1798 hasta el de febrero de 1799 creció en Tucumán a tal grado la carestía "...que se pitaban raíces y los cabellos de choclos en toda la campaña".<sup>5113</sup> Fue entonces, con motivo del descontento y virtual estado de amotinamiento popular que se había generado, que el Gobernador de Salta condescendió en la venta del tabaco de contrabando, y Soloaga aprovechó para convertir "en factoría la Administración, mandando hacer cigarrillos de papel, y sacando ocho reales de cada maso de tabaco", el cual se vendía a 4 y 6 reales cada uno, "...cuando el Rey lo vende a real y medio".<sup>5114</sup>

Pero el colmo de la defraudación fiscal era lo que ocurría con la Renta de Tabaco y Naipes en Buenos Aires mismo. Manuel José de Lavalle declaraba el 30 de diciembre de 1793 que

"...el contrabando de tabaco Brasil se halla tan extendido en esta ciudad y sus campañas, que no se puede tocar de esta materia que causa rubor; porque desde el Cavallero Gobernador de la Plaza, hasta el más infeliz de ella, saben que nada se vende en los estancos por la multitud de fraude que se expende, con tal desvergüenza, que ha sucedido pasar por delante de mi casa Administración de noche las cargas de tabaco Brasil con sus caballos, armas, y defraudadores".<sup>5115</sup>

El contrabando de tabaco seguía dos rutas: la terrestre y la fluvial. La primera se consumaba a lomo de mula a través de la Banda Oriental. La segunda operaba bajando los ríos Paraná y Uruguay. El Teniente Visitador del Resguardo revelaba que este último se practicaba

"...colocando las piezas de tabaco en las piraguas como si formaran piezas menudas, entre la carga principal, y después de pasar el registro de la falúa corsaria descargar en los parajes que les acomode o trasbordar en canoas o balsas para que sigan a su destino".<sup>5116</sup>

## **P-IX La región cuyana.**

Finalmente, de los desfalcos tampoco estuvo exenta la región cuyana, pese a su carácter marginal respecto al circuito mercantil Alto peruano. Como Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro de la Real Hacienda en San Juan, fue designado en 1785 Don Juan Manuel de Castro y Carreño, hijo de quien fuera Administrador de la Real Renta de Tabaco de Tucumán y Córdoba, Coronel Manuel Castro. En su gestión Juan Manuel revela haber aprendido de la experiencia de su padre los secretos y las vulnerabilidades de la burocracia colonial, pues una vez instalado en San Juan emprendió toda suerte de ilícitos. Ello dio lugar a que más tarde, en 1808, Castro y Carreño fuera acusado por el Comandante de Milicias de San Juan, José Xavier Jofré Rivero,<sup>5117</sup> de deber su prosperidad a un sin fin de actividades ilegales. Estas actividades delictivas Carreño las combinaba a discreción y las sostenía merced a "...la armonía y unión con los subdelegados, a fin de que le disimulen tan escandalosos defectos".<sup>5118</sup> Efectivamente, a juzgar por un testimonio de época Castro había conservado una fina e íntima amistad con

el Subdelegado Santiago Jofré y Cano de Carvajal, dueño de trapiches donde se molía el mineral de Jáchal y Gualilán, y padre a su vez de José Xavier Jofré. Esta amistad duró hasta que Santiago Jofré falleció

"...tanto que jamás se le vio la menor independencia y lo trataba de padre de él y de sus hijos, del mismo modo se vio corresponderle el Subdelegado hasta la muerte de suerte que guardaron una armonía y confianza admirable, que no se puede dar mayor".<sup>5119</sup>

Por un lado, José Jofré --hijo del finado Santiago Jofré y de María Josefa Riveros-- se había distanciado de Castro, denunciándolo finalmente en 1808 por el ilícito proceder de vender por su cuenta al por mayor los azogues del Rey, al precio de 12 reales cada libra, y a los mineros pobres de Jáchal que venían a comprarlo al por menor, a 18 reales cada libra. Asimismo le incriminó "...los excesivos valores en que expendía los Sumarios de Bulas e indultos, sin que aquel Pueblo haya recaudado la demasía".<sup>5120</sup> Además, José Jofré le imputó el "...punible comercio de los tabacos, que distribuía por amistad, usando de infieles romanas, y originándose de todo esto su desconcepto y mala opinión".<sup>5121</sup> Por último, Castro y Carreño solía sacar guías fraudulentas declarando so capa de cargas de vino cargas de aguardiente, que si bien podían tener igual gravamen en el lugar de expedición no lo tenían en el lugar de destino.<sup>5122</sup> También solía Castro otorgar las guías de aduana a sus paniaguados para que introdujeran sus mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la mercancía en puntos intermedios. En otras palabras, los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en el destino fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Por último, los comerciantes retornaban la guía a Castro y Carreño, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.<sup>5123</sup> Otro testigo del proceso judicial antes mencionado concluye que el veloz enriquecimiento de Castro y Carreño "...es un singular fenómeno que no tiene ejemplar tanto porqué no se le han conocido negocios que le pudieran haber producido estas ganancias como porqué el lugar no los tiene ni su giro los ofrece".<sup>5124</sup> No obstante la riqueza acumulada, Castro y Carreño se endeudó excesivamente con el comerciante porteño Domingo Belgrano Pérez mediante una operación de fiado practicada en febrero de 1786 por valor de \$12.155, que nunca alcanzó a cancelar.<sup>5125</sup> La quiebra fraudulenta del Administrador de la Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, y del Administrador de la Aduana de Montevideo Antonio Quintana Laso de la Vega, ambas cometidas en el bienio 1788-89, y la correlativa quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, con quien Castro y Carreño estaba endeudado, terminaron por arrastrar también la suerte de este último.<sup>5126</sup>

Con referencia a la quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, el Oídor Decano José Cabeza Enríquez, comisionado en varios incidentes de la quiebra del Administrador Tesorero de la Real Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, le imputó a Belgrano no haber hecho, en las primeras declaraciones que se le tomaron cuando se le consideraba cómplice de la quiebra de Mesa, manifestación de los efectos que pertenecieron a éste último.<sup>5127</sup> En su defensa, Belgrano alegaba haber ignorado a quien pertenecieron tales efectos, y de si eran de Ximénez de Mesa o de Ortega y Monroy, otro de los imputados por cómplice de Mesa. Belgrano sostenía que siempre estuvo en la idea que el haberse puesto la mercadería en su poder de orden de Ortega,

"...provendría de algún encargo que este mismo sujeto hubiese tenido de algún comerciante de España, para darle salida, y que considerándome Ortega sujeto proporcionado, y de su confianza, para que por mi dirección corriese la venta de la

factura, previno a José González Bolaños que me la entregase para este intento".<sup>5128</sup>

Con esta estrategia argumental pudo Belgrano zafar de las acusaciones de cómplice de quiebra fraudulenta, lo cual no le sirvió para sortear su propia quiebra, ni tampoco la de sus clientes en el resto del Virreinato, como fue el caso de Castro y Carreño en San Juan.

Pero la crisis económica provocada por el bloqueo continental que Inglaterra practicaba en Europa, la desarticulación del comercio exterior e interior que esta crisis engendró, la crisis minera que la penuria de azogue y mano de obra había causado, el fracaso de la burocracia en reprimir las quiebras o fallas de la administración colonial, y la consiguiente crisis fiscal que se desató en todas las provincias, necesariamente debió haber provocado fisuras y rivalidades que con posterioridad la revolución y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos. Como botón de muestra, Mariano Moreno se refirió reiteradamente en su discutido Plan de Operaciones a la corrupción reinante en ese entonces.<sup>5129</sup>

De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus autores fueron en la mayor parte de los casos criollos.<sup>5130</sup> Esto revela que los casos de corrupción que constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX latinoamericano.

## Capítulo II-G-20      **Extorsiones y sobornos en la conducción de caudales de Potosí a Buenos Aires.**

### Índice

- Q-I      Premio de la moneda doble.
- Q-II     Control de los Situados Reales y de Comercio.
- Q-III    Demora en partir el Situado de Potosí.
- Q-IV    Presiones para designar el Conductor del Situado.
- Q-V     Presencia de gratificaciones, regalías, o propinas.
- Q-VI    Prontitud o brevedad en el transporte del Situado era la condición más importante para ser tenido por un Situadista exitoso.
- Q-VII   Designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí.
- Q-VIII   Historia de la vulnerabilidad del estado colonial.
- Q-IX    Desavenencias acerca del Situado.

- Q-X Control de la evasión fiscal.
- Q-XI Malversación de los caudales reales y privados.
- Q-XII Control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí.

## **Introducción del capítulo II-G-20**

En este capítulo, me he propuesto aplicar los esquemas ensayados por Pietschmann (1982,1987) para analizar y explicar la corrupción existente en las colonias españolas de América. Para examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación española en América es preciso explorar aquellos cargos públicos donde se contemplaban mecanismos discrecionales de reclutamiento y participación de sus miembros, como era el caso de los conductores de los Situados Reales. Para ello distinguiremos en este trabajo como corrupción sólo aquellas actividades de funcionarios que violaban la confianza puesta por el público en los mismos. El cohecho o soborno, el nepotismo, favoritismo, o clientelismo, entrarían en esta definición de corrupción.

Como es sabido, la principal fuente de acumulación de capital durante la vigencia del comercio colonial se fundaba en las diferencias de precios generada en el intercambio de mercancías y monedas. Estas diferencias dieron lugar desde los mismos inicios de la colonización española a crónicas defraudaciones y estafas que reflejaban en su forma más aguda y patética las contradicciones secundarias por la renta minera entre los Mercaderes de Plata y los comerciantes españoles, vecinos de Lima o Buenos Aires, transitoriamente residentes en Potosí. Asimismo, existieron en el Alto Perú, y en general en todo el mundo colonial hispanoamericano, diversas fuentes oficiales de recursos donde se alimentaba la especulación financiera, y la tentación de defraudar o estafar al fisco real. Estas fuentes oficiales fueron fundamentalmente las Cajas Reales, la Compañía de Azogueros, los Situados Reales, la Real Renta de Correos, la Bula de la Santa Cruzada, y la Renta de Tabaco y Naipes.

### **Q-I El premio de la moneda doble.**

Es sabido también que el valor de los diversos tipos de moneda pese a su equivalencia general sufría de oscilaciones en su oferta y demanda que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que el lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos y la naturaleza de la mercadería introducida incidía en el tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú, por lo general era hecha en moneda columnaria o doble, y si en Chile en doblones de oro. Si se trataba de saldar deudas contraídas por introducir en el Alto Perú aguardiente, yerba, mulas, o textiles de las provincias abajeñas, el pago por lo general se hacía en moneda sencilla. Mas si se trataba de géneros importados la deuda se debía saldar en moneda doble. Por su naturaleza de circulante menudo, la moneda sencilla vino a sustituir o desplazar en el mercado interno a la moneda doble, la cual constituía el dinero-mercancía por excelencia para saldar las importaciones del comercio exterior. La moneda cobrada a los comerciantes del interior que compraban géneros de Castilla a crédito en Buenos Aires, era canjeada en el Alto Perú a moneda doble y remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así como base o respaldo monetaria de un circulante compuesto por moneda sencilla. Este circulante implicaba un mecanismo multiplicador que convertía los medios de pago en un múltiplo de la moneda doble. Era también utilizado por los funcionarios

peninsulares que arribaban a sus lugares de destino para saldar las deudas contraídas para viajar y hospedarse, y por los comerciantes que llegaban al Alto Perú para saldar sus deudas con los Oficiales de la Real Hacienda en los numerosos puestos donde bajo fianza habían quedado adeudando los derechos de sisa y alcabala.<sup>5131</sup>

Las oscilaciones del premio de la moneda doble obedecían a que las tres Mercancías de Plata existentes en Potosí especulaban con la partida de los diversos Situatedos, los cuales debían estar compuestos exclusivamente por moneda doble, dado que el premio de la misma era más alto en Buenos Aires que en el lugar de partida. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero sí existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%.<sup>5132</sup> En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%.<sup>5133</sup> En la tarea de introducir ilegalmente mercadería procedente de la Colonia del Sacramento la moneda doble tuvo un rol protagónico. Por cada peso fuerte o doble correspondían 750 reis en lugar de los 640 reis que correspondían a un peso sencillo de ocho reales. Finalmente, en 1772 se impuso en Buenos Aires por Real Orden un premio del 3%. En una palabra, mientras que a un peso doble se lo estimaba en Buenos Aires en 1778 en 8 1/4 reales, es decir con un premio del 3%, en la Colonia del Sacramento se lo llegó a estimar en 9 3/8 reales de plata, es decir se le aumentaba el equivalente de 1 3/8 de real por cada 110 reis, o el equivalente a un premio del 17%.<sup>5134</sup> También existió un premio entre el oro y la plata, a favor del primero, que oscilaba entre el 7% y el 8%. Esta oscilación estaba en función de la abundancia o escasez de la plata. La escasez de moneda de plata hacía que bajara el premio del oro, y viceversa, su abundancia hacía que su premio subiera.<sup>5135</sup>

En épocas excepcionales, como fue la rebelión de Tupac Catari, el premio de la moneda doble en Potosí alcanzó al 4%. En una muy ilustrativa carta escrita desde Potosí por Josef Beláustegui a Juan de Lezica y Torrezuri el 16 de marzo de 1781 el primero le manifestaba "...toda la plata que tengo en mi poder la he reducido a doblones aunque me an costado al 4% pero con todo doi mil gracias pues en una carguita caminará todo".<sup>5136</sup> Pero no siempre y en todos los lugares, este premio era respetado. En la provincia de Córdoba, Agustín de Olavarrieta, funcionario del Tribunal de Cuentas, declaraba en un litigio acontecido en agosto de 1805, que en dicha provincia "...se considera del mismo valor la plata fuerte que la sencilla o macuquina".<sup>5137</sup> De dicha realidad, Olavarrieta deducía "...sin violencia"

"...que siendo el peso fuerte en Córdoba de igual valor al que se compone de monedas menores,...,el peso fuerte de esta Capital hace par, o no es de más valor que el peso de Córdoba, bien sea en una moneda de rostro o formado de las menores monedas que corren en aquella provincia".<sup>5138</sup>

## **Q-II El control de los Situados Reales y de Comercio.**

El dispositivo que más se prestaba a mecanismos de defraudación y estafa era el control de los Situados Reales y de Comercio.<sup>5139</sup> El control de estos Situados recaía en los Situidistas, responsables de transportar los subsidios a los Presidios o plazas fuertes y los caudales públicos y privados a los puertos, para su remisión a España. Los situidistas a su vez, estaban considerados como una suerte de Maestres de Plata "...depositarios del común del Comercio, que contraen la obligación explícita en los conocimientos, de entregar lo que reciben, a sus dueños o consignatarios, por el estipendio que entre los contratantes se estipula".<sup>5140</sup> Andrés de Ibieta, como apoderado de Juan Bautista Villegas, Juez Subdelegado del Partido de la Puna en la Provincia del Tucumán, en un litigio que contrajo con un vecino de Jujuy llamado Tomás Joseph Gómez reputaba a los Situidistas

"...como a unos Maestres de Plata en quienes se depositan todos los caudales y mercancías, y en cuia buena fe se afianza la fiel tradición de cuanto conducen con sus despachos y registro; mirados a estos conductores con cualquiera de los dos conceptos, es inconcuso que tienen una obligación estrecha de hacer la tradición pronta y liberal de todo cuanto conducen y que sino lo executan se hallan en precisión de sufrir el rayo de la ejecución hasta que puntualmente lo cumplan".<sup>5141</sup>

## **Q-III La demora en partir el Situado de Potosí.**

Entre las causas que hacía que los Situados fueren vulnerables a la defraudación y la estafa estaban: la demora en partir de Potosí, la innumerable suerte de presiones a las que estaban sujetos quienes eran responsables de su control, y la catadura moral del apoderado designado por el Presidio de Buenos Aires frente a las Cajas Reales de Potosí. El tiempo que tardaba el apoderado del Presidio de Buenos Aires en obtener en Potosí moneda doble a cambio de la moneda sencilla, que también recibía de las Cajas Reales, era el tiempo que se demoraba el Situado en partir, y el tiempo que el Banco de Plata aprovechaba para hacer "trabajar" el dinero. Por ejemplo, en 1748 por mandato del Virrey de Lima se ordenó remitir a Buenos Aires con el fin de subsidiar las labores de defensa 116 mil pesos, para cuyo despacho le pidieron los Oficiales Reales a Isidro José Navarro diese más de 80 mil pesos en plata doble.<sup>5142</sup> En carta a Nicolás de la Quintana y Echeverría, Veedor General del Presidio de Buenos Aires, Isidro J. Navarro le expresaba el 9 de mayo de 1748 que "...aunque los tenía enzurronados para el situado fué preciso se demorase hasta reemplazarlos en dobles por este motivo se ha hecho preciso la detención".<sup>5143</sup> La operación de reducir la moneda sencilla a doble se practicaba reduciéndola primero a barras, en Oruro, donde como vimos los derechos de avería eran mucho más bajos que en Potosí, para luego reacuñarlos en moneda doble.

## **Q-IV Las presiones para designar el Conductor del Situado.**

Las presiones para designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de Buenos Aires de parte de los Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, del Virrey del Perú, y de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas. En oportunidad en que regenteaba la Procuraduría del Presidio de Buenos Aires Isidoro J. Navarro, éste le detallaba a Quintana en Mayo de 1750 que

"...en fuerza de los empeños al Asesor del Virrey [Francisco de Hervoso] por una parte y por otra el empeño del Secretario me hallo bien estrechado sin saber lo que debo executar ha vista de la obligación que me corre de servir al Sr. Marcos [Riglos]".<sup>5144</sup>

En virtud de los compromisos adquiridos con Marcos José de Riglos, Navarro le manifestaba a Quintana

"...contemplo no podrá habilitarse para volver a esa ciudad hasta el año que viene, que iré proporcionando la cosa a fin de ver si puedo complacer a V.md., porqué se me hace muy duro hauer de faltar a la palabra que tiene uno dada".<sup>5145</sup>

También el primer apoderado del Presidio de Buenos Aires luego de la quiebra de la Casa de los Navarro, el R.P. Miguel Saloguen S.J., sufre la presión del propio Presidio en la selección del conductor. En 1752 Quintana le reclama a Saloguen elija a Francisco Cabrera como Conductor del Situado. Pero Saloguen se disculpa aduciendo en abril de 1752 "...con arto sentimiento mío" no poder tener lugar el pedido ni para el presente ni para el Situado que le sigue pues "...ha tres meses que tengo dada palabra, en fuerza de los empeños de dos Oidores de Chuquisaca".<sup>5146</sup> El mismo Juan Francisco Uzal S.J., el siguiente Procurador del presidio de Buenos Aires, no dudaba en Enero de 1753 que había en la selección del Conductor del Situado "...muchos empeños para sujetos de esta Villa [Potosí],...como Don Manuel Prego de Montaos,<sup>5147</sup> Don Pedro Maquiriain, Don Joseph de Lezica,<sup>5148</sup> y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marqués de Casa Palacio".<sup>5149</sup>

#### **Q-V La presencia de gratificaciones, regalías, o propinas.**

Lo que hacía que estas presiones fueren una fuente de corrupción era su naturaleza extorsiva debido a la presencia cuasi-institucionalizada de gratificaciones, regalías, o propinas. La gratificación era precisamente aquello que se daba a algún funcionario por encima del sueldo o salario que debía percibir.<sup>5150</sup> A los efectos del cobro del Situado Real en las Reales Cajas de Potosí, los apoderados del Presidio de Buenos Aires debían facilitar a los Oficiales Reales de dichas Cajas suculentas gratificaciones. Estas recompensas o propinas dieron siempre lugar a controversias acerca de su monto y de la oportunidad de su pago. La discusión acerca de la oportunidad del pago revela la desconfianza mutua que se prodigaban ambos, el apoderado del Presidio y los Oficiales Reales de Potosí. En Mayo de 1751 Isidoro Navarro en carta a Quintana, denuncia que estuvo necesitado de "...proferir no les había de dar la gratificación asta que no me enterasen el Situado".<sup>5151</sup>

Es evidente que los Oficiales Reales de las Cajas Potosinas extorsionaban a las autoridades del Presidio de Buenos Aires, en el otorgamiento de los correspondientes Situada, con la excusa de las supuestas órdenes procedentes de Lima y las necesidades financieras de otras Cajas subsidiarias. Dichas órdenes incluían todo tipo de argucias. Cuando en Mayo de 1751, Navarro denuncia la falta del entero de los dos meses que restan del Situado de 1749 advierte que "...como todos estos años no se han enviado las certificaciones que está prevenido deben venir con las listas, parece a tirado el Virrey a que se retengan los dos meses que se deben".<sup>5152</sup> Las obligaciones financieras para con otras cajas particulares y privilegiadas de la Real Hacienda le quitaban a veces al Presidio de Buenos Aires la prioridad en el otorgamiento del Situado. Cuando en Febrero de 1754 Uzal soborna a los Oficiales Reales con \$200 a cada uno, fue para que antepusieran la paga del medio situado "...a todas los [situados] que tienen que hacer a Oidores de Chuquisaca,

y al de los cien mil pesos para el Marqués de Valdelirios en que ahora andan apurados por falta de plata".<sup>5153</sup>

No siempre los Oficiales Reales de la Caja Potosina comulgaban al unísono en sus mezquinos intereses. De los tres miembros que la componían (Factor, Contador, y Tesorero) el Contador Marqués de Casa Palacio debía recibir por parte del apoderado del Presidio un trato excluyente debido a "...los buenos oficios que ha practicado en beneficio de ese Presidio". Estos buenos oficios que debían ser premiados --seguramente logrados merced a su parentesco con el Corregidor Santelices-- consistían en no haber sido "...cómplice en la maldad que tienen executada los otros dos".<sup>5154</sup> Sin embargo, nada podía hacer un solo Oficial Real si los otros dos estaban unidos y opuestos al Presidio de Buenos Aires. A juzgar por la misiva del 19 de febrero de 1754 "...será muy conveniente el que a sus dos compañeros Factor y Teniente de Tesorero se les den \$500 a cada uno por cada año, porque si ellos [dos] se unen..., nada hará solo el Marqués, que por eso me persuadió ahora a que les diese siquiera a \$200 a cada uno, por la necesidad en que se hallan".<sup>5155</sup> Las regalías solían alcanzar hasta los mil pesos por Oficial Real en cada Situado.<sup>5156</sup>

Cuando cambiaba el apoderado del Presidio de Buenos Aires, las órdenes respecto a las regalías a distribuir entre los Oficiales Reales solían alterarse, provocando ello la consiguiente angustia en los mismos. En Octubre de 1753 el nuevo apoderado Uzal le anuncia a Quintana que desde Chuquisaca el Tesorero José Manrique, hermano de Pedro Manrique, cuya actuación veremos más adelante, "...suspira por su antigua regalía...de los mil pesos en cada situado pero yo hago que no oigo".<sup>5157</sup>

La mezquindad en la distribución de las regalías solía traer todo tipo de ojeriza. Cuando en Febrero de 1754, otras Cajas subsidiarias ponen a los Oficiales Reales en aprietos financieros, Uzal le cuenta a Quintana que

"...juzgo muy importante el darles algo con el secreto que ahora lo hize, y así todos quedarán contentos, siendo cierto que me miraban muy mal todos ellos, menos el Marqués, por la grande cortedad con que anduve en el Situado antecedente".<sup>5158</sup>

La distribución de estas recompensas padecía asimismo de una estratificación interna. En el caso de oficiales de menor rango como los escribanos, las regalías eran por cierto mucho menores, alcanzando a lo sumo \$50 por cabeza cada tercio del Situado. Este monto debe haberse considerado como muy mezquino por cuanto al tenor de la carta de Diciembre de 1753 Uzal le revela a Quintana que el anterior apoderado Saloguen "...estuvo enfadado de que no hubiesen agradecido aquellos \$50 que les repartió".<sup>5159</sup> Aparentemente, estos oficiales menores especulaban con que los nuevos apoderados del Presidio ignoraban el monto de las regalías que les habían dispensado los apoderados precedentes. En el caso del Oficial Robles, que tan "sinistramente" le protestara a Quintana por el monto de las regalías recibidas, le hacen exclamar a Uzal "...que yo [Uzal] solo practiqué lo que mi difunto compañero [Saloguen] dejó entablado en el último tercio que cobró y en que sólo gastó en estos oficialejos y escribano los \$50 que constan de la Cuenta".<sup>5160</sup>

La renovación de los Oficiales Reales de la Caja de Potosí no obstaba a que, en algunos casos --cuando aún faltaba la resulta del Virrey para la remoción de algún Oficial Real-- se continuara por las dudas en el pago de la regalía respectiva al Oficial por remover. Luego que la Casa Navarro quebrara, el Marqués de Casa Palacio recomendaba en mayo de 1757 a Uzal que se le retribuyera en algo a Isidoro Navarro pues aún

"...persevera en su empleo". En la misma misiva, Uzal le aclaraba a Quintana que "...si me alargare algo en este particular de gratificación a estos caballeros, y a tanto Ministril de la Caja, será a más no poder, y por necesidad de adelantar el tiempo en la prontitud de la paga, y con la mira de dejarlos gratos para la subsecuente".<sup>5161</sup>

#### **Q-VI La prontitud o brevedad en el transporte del Situado era la condición más importante para ser tenido por un Situadista exitoso.**

Una vez arribado el Situado al lugar de destino --Buenos Aires-- se abonaba el mismo directamente a los comerciantes acreedores, sin que la plata pasara por los Oficiales Reales. Esto último se reconoce por la falta de entrada de situados en los Libros Manuales de las Cajas Reales de aquel tiempo. De ello se infiere que los Oficiales Reales de las Cajas de Buenos Aires no corrían con los pagamentos de la tropa del Presidio, sino que los Situados "...venían dirigidos a los mismos acreedores, sin causar a los Oficiales Reales el trabajo de la administración de este caudal, ni el de su cambio y reducción a moneda sencilla, ni riesgo de fallas, ni su reposición".<sup>5162</sup> Luego, con esa moneda doble tan apreciada, obtenida como cancelación de las deudas de la tropa del Presidio, los mercaderes o comerciantes residentes en Buenos Aires, citados anteriormente, adquirirían mercadería ilegal a los comerciantes portugueses de la Colonia del Sacramento.<sup>5163</sup>

#### **Q-VII La designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí.**

En las vicisitudes del Situado, la designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí también jugaba un rol crucial en la vulnerabilidad de los Situados a la defraudación y la estafa. Durante la larga gestión de la Casa de los Navarro, como Mercaderes de Plata y apoderada del Presidio de Buenos Aires, los apoderados o procuradores variaron en una sóla oportunidad. En mayo de 1748 Isidro J. Navarro le sugiere a Quintana acepte la sustitución del poder en su primo Gregorio Navarro, quien queda con el trajín de la Mercancía de Plata conjuntamente con su sobrino Juan Joseph Pérez Navarro, por cuanto "...entrando yo al ejercicio de mi Plaza [de Contador Oficial Real] veré las cosas de adentro y procuraré venser qualquier dificultad para que no se demoren las pagas, y puedan ir los socorros con más brevedad".<sup>5164</sup> La asunción de I. J. Navarro en dicho cargo significó la exoneración de José Palacios y Santelices --cuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán. Con la remoción de Palacios de la Contaduría de las Cajas Reales, la facción liderada por el Visitador Herboso e Isidro J. Navarro había logrado consolidar el desplazamiento del Banco de Miguel Antonio Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, continuadores del Banco de Rodríguez de Guzmán, del mercado de la plata potosina.<sup>5165</sup> Una vez concretada la sustitución del apoderado del Presidio, Isidro J. Navarro le escribe a Quintana en enero de 1749 agradeciéndole que hubiese quedado satisfecho "de la sobstitución del poder en mi primo", pues ello le servira de más estímulo "...para que las cosas se procuren arreglar".<sup>5166</sup> Sin embargo, Quintana no había quedado satisfecho con dichos cambios.

Con motivo de la excesiva demora del Situado de 1750 y el aparente cansancio de Navarro, Quintana le escribía que "...hizo vd. muy mal el hauerse mezclado en esa caxa especialmente hallándose V.M. en la postura en que se hallaba [Mercader de Plata y Apoderado del Presidio de Buenos Aires]". Por toda recomendación Quintana le aconsejaba a Navarro que "...si se hallase forma de poder desaserse de dicha Plaza [de Contador Oficial Real] lo executara dándole el Rey algún equivalente".<sup>5167</sup> No habiendo

dado Navarro señales de vida, y el Situado Real demorado por más de 18 meses, el Presidio de Buenos Aires sospechando lo peor (un desfalco) se vio precisado en Julio de 1751 a revocar el poder y mudar de apoderado. La designación recayó en el Procurador de la única institución que podía ofrecer credibilidad y confianza: la Compañía de Jesús. Para ello la Compañía escogió al R. P. Miguel Saloguen S.J., a quien Quintana le ordenó inmediatamente en la misma carta que "...ponga en ejecución la entrega de los caudales, que existen en su poder de los 18 meses".<sup>5168</sup> Asumido el cargo, Saloguen le expresa a Quintana en su primera carta de Septiembre de 1751 "...que lo que el anterior apoderado [I.J.Navarro] ha percibido en estas Cajas y debe al Presidio [18 meses], es lo que me causa más compasión, porque en la presente providencia lo considero perdido".

Aparentemente, el conductor del Situado desaparecido fue Don Pedro Manrique, hermano del Oficial Real Joseph Manrique, y sus cómplices en dicha desaparición Don Isidoro Navarro y Don Juan Antonio Rivera. Esta sospecha se confirma por los términos de la carta que José Manuel Angulo dirigiera al Gobernador Andonaegui desde Santiago del Estero, en enero de 1751, que revelan el destino y las relaciones del controvertido situadista. En dicha carta Angulo gestionaba transporte en el navío de Villanueva para el Caballero Manrique, pues "...va dicho situadista con ánimo de pasear a Europa, para ver a sus parientes, que los tiene en gran auge en la Corte".<sup>5169</sup> Un año más tarde, en carta dirigida a Quintana, Saloguen le previene en Abril de 1752 que el Tesorero Joseph Manrique "...sospechando lo que puede suceder, con su hermano Don Pedro [Manrique]...envió orden para conseguir licencia de beneficiar esta su Plaza, y ni éste ni los otros dos cómplices...tienen seguridad de la vida".<sup>5170</sup> Por toda medida, y con el fin de rescatar lo perdido Saloguen le hace ver a Quintana "...que necesito del testimonio de dicha fianza [otorgada por el Conde de Casa Real de Moneda] que allá se habrá otorgado, para demandar al que está acá".<sup>5171</sup> Un par de años después, y habiendo fallecido el R.P. Saloguen, Uzal le aconseja a Quintana "...que lo que conviene es dar el Poder al que es, o fuere Procurador por la Provincia de Castilla [Compañía de Jesús] en Potosí, y nada más, porque sólo así podrán estar allá sin cuidado".<sup>5172</sup> Finalmente, el Presidio de Buenos Aires confirma su confianza en el Procurador de la Provincia Jesuítica, Juan Francisco Uzal, S.J.. A diferencia de otras ordenes religiosas, lo que hacía de la Compañía de Jesús que gozara de mayor predicamento financiero entre los Capitanes del Presidio era que podían dar dinero a réditos sin necesidad de pedir licencia del Obispo correspondiente.<sup>5173</sup>

No obstante la defraudación cometida, no se encontraron bienes ni deudas a favor de los Navarros que poder pedir o embargar. El destino personal de los Navarro tampoco fue muy edificante. En carta a Quintana, Uzal le informa el 12 de abril de 1753 que uno de los Navarro [Isidro] estaba "...en esta Caja a medio sueldo para comer, y el otro [Gregorio] metido a minero en Lipez, último recurso de los perdidos, en vista de lo cual ninguno de los acreedores se mueve, por considerar ser inútil, y lo perdido perdido".<sup>5174</sup> Uzal no se quedó con los brazos cruzados e intimó a fines de 1753 con Gregorio Navarro con el fin de descubrir la verdad. Mas Navarro "...claramente dice que nada hay, ni sé como el pobre se mantiene en esta Villa, después que volvió de Lipez adonde habrá pasado a trabajar una Mina". En cuanto a Isidoro "...va pasando con su medio sueldo de Oficial Real en la Caja, insensible a todo lo demás, echando la culpa a Don Gregorio, y este al primero, sobre la quiebra pasada".<sup>5175</sup> Don Isidro perseveró en su empleo hasta mediados de 1757, pero en julio de dicho año exhaló su último suspiro, a juzgar por una misiva de Uzal a Quintana, donde aquel le relata que

"...el día primero del corriente [1-VII-1757] como a las diez del día se llevó Dios a Don Isidro Navarro, después de todas las disposiciones cristianas a que lo preparó el Padre Rector de este Colegio, en cuya Iglesia se enterró por lo mismo de ser pobre en realidad",<sup>5176</sup>

Ni lerdo ni perezoso, Uzal, presintiendo el fallecimiento de Navarro, le había escrito el 27 de junio, en defensa de los intereses del Presidio de Buenos Aires, al Visitador General Ventura de Santelices y Venero,

"...presentándole sigilosamente una Petición para precaver cualquier substracción de bienes o papeles, y con efecto puso su Señoría todo el conveniente resguardo hasta la hora en que espiró, y en la misma pasamos en Persona a la Casa con escribano y echando llaves a todo, dejando en ella al Alguacil Mayor para custodia, se retiró su Señoría hasta que pase todo el funeral, y se empiezen los inventarios, a que he de asistir, y en las horas que no puedo, quedará persona de mi satisfacción que tengo nombrada".<sup>5177</sup>

Sin perjuicio de los inventarios, y a ojo de buen cubero Uzal estimaba:

"...lo que por mayor hemos visto llegará al valor de 60 mil pesos, unos dicen más y otros menos, y lo que juzgo es, que separada la dote de su mujer, que toca al hijo clérigo, no sera mucho lo que sobre".<sup>5178</sup>

Viendo la mayoría de los acreedores de la Casa Navarro que el Presidio de Buenos Aires era el acreedor que contaba con el mayor y mejor derecho de preferencia, los Oficiales Reales comenzaron a esgrimir en 1757 la argucia de que existía una cuenta por la cual se "saca no deber nada de situado la Casa de Navarro al Presidio, antes lo alcanza en cierta cantidad".<sup>5179</sup> Más aún, era tanta la oposición que se levantó en Potosí contra la deuda que Uzal le manifestaba a Quintana en Julio de 1757 que

"...es conveniente el que allá no se pierda tiempo remitir dichos instrumentos (certificación de las partidas que Don Gregorio recibió en esta Caja) bien instruidos y claros, porque es mucha la oposición que hay aquí contra dicha deuda..."<sup>5180</sup>

Tanta era la oposición que había en Potosí contra el pago de la deuda al Presidio de Buenos Aires, que hasta al Visitador Santelices (a quien Uzal confesaba tener de su parte)

"...lo hacen dudar de la certidumbre de ella; y temo que me han de echar fuera del concurso [de acreedores], por falta de cargo justificatorio, y de poder para demandar el débito",<sup>5181</sup>

Más aún, en carta posterior dirigida a Quintana, y no dando crédito a lo que escuchaba, Uzal le refiere que en Potosí "...antes se infiere que los Navarros anticiparon Caudal propio al Presidio como lo dicen aquí muchos, lo que yo no puedo creer, cuando vimos la quiebra que sucedió [a Navarro] por falta de dinero".<sup>5182</sup> A excepción del Visitador Santelices que parecía mantenerse neutral, Uzal cuenta, entre consternado y por que no decir también algo acobardado, que en Potosí:

"...Todos,...,son aquí contra mí, o contra la deuda, y los Oficiales Reales más, sentidos de que yo hubiese pedido la Declaración de ella [o quiebra], y si eran responsables los Oficiales Reales que hicieron la paga a Don Gregorio, como vería

V.md. en la copia de dicho escrito que incluí en el Correo ordinario esto lo sintieron mucho, como me han asegurado; y aún el Oficial Mayor Agreda anda prometiendo que ha de sacar en limpio a favor de la Casa de Navarro cosa de 80 mil pesos que debe el Presidio por que aún no cargó en la cuenta que sacó las gratificaciones que acá daban a Oficiales Reales y otros gastos de cobranza".<sup>5183</sup>

En cuanto al deudor supérstite, Gregorio Navarro, Uzal le informa a Quintana que

"...Don Gregorio se hace muerto, y dice que no recibió nada de situado, de que sólo disponía su primo Don Isidro, de quien sólo era un mero cajero: y Don Isidro dijo en su enfermedad que en el Situado no había tenido arte ni parte..."<sup>5184</sup>

Confundido Uzal por tanta contradicción, termina por suplicarle a Quintana que lo ayude a entender este entuerto en términos tales que por sí solos revelan el clima que entonces se vivía en Potosí: "...compóngame V.md. estos dichos de hombres como aburridos de sí mismos".<sup>5185</sup> Pero en su terco afán por averiguar la verdad del desfaldo, Uzal le inquiere un mes después a Quintana

"...remita la cuenta formal que en tres anteriores cartas tengo pedida, con cargo y data de lo que aquí recibieron los Navarros, y lo que allá se recibió remitido por ellos, con expresión de la cantidad recibida en esas Cajas, con qué persona, por qué año de sueldos, y en qué tiempo llegó allá el conductor",<sup>5186</sup>

Estas preguntas obedecían a una suerte de trabajo de inteligencia iniciado por el propio Uzal con el fin de detectar quién finalmente se había quedado con los dineros reales. En ese sentido Uzal le preguntaba a Quintana:

"...se necesita saber esto de lo que llevó Domingo Basavilbaso y Don Pedro Manrique, que fueron los dos últimos conductores de situados que salieron de Potosí por los Navarros, el primero en el año 49 y el segundo a fines del 50, y si estos entregaron en Buenos Aires lo que dice la cuenta del Oficial Mayor que lo ignoro totalmente..."<sup>5187</sup>

La oposición de los demás acreedores --posiblemente acreedores fraudulentos-- a las diligencias judiciales provocadas por la deuda de los Navarro, al no responder a los traslados que los Jueces de la Causa mandaron darles, "...no hay forma de hacerles mover".<sup>5188</sup> Recién en 1759, y por diligencia del apoderado de los Presidios de Buenos Aires y Lima se trajo al cúmulo del concurso

"...los \$8300 que ya reconoce el Sr. Joseph de Herboso sobre sus Ingenios de esta Rivera en cuyo havío los había gastado su hermano Don Joaquín Herboso, valiéndose para ello de unos tejos de oro que tenía del difunto D. Isidoro en confianza".<sup>5189</sup>

De aquí que la caída de la Casa Navarro también arrastra a José Herboso y Figueroa, dueño de los Ingenios Chaupi y Jesús María, Visitador de Potosí entre 1746 y 1747, Contador Principal del Tribunal de Cuentas de Lima a partir de 1749, hermano de Francisco de Hervoso, Asesor del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y suegro del Conde de San Miguel de Carma.

## **Q-VIII La historia de la vulnerabilidad del estado colonial.**

La historia de la vulnerabilidad del estado colonial al cohecho o soborno presentaría aparentemente excepciones notables. Una de ellas habría sido la de Ventura de Santelices y Venero, Corregidor y Visitador General de la Villa de Potosí. La conducta de este alto funcionario colonial en esta estafa o desfalco fue por demás controvertida y contradictoria. Por cierto, apenas Santelices hizo su entrada en la Villa, enviado por el Virrey del Perú Conde de Superunda, para que se obstaculizaran las relaciones con el Río de la Plata, se suscitaron toda suerte de vicisitudes en la consecución del situado.<sup>5190</sup> Aparentemente, la más perjudicada por la presencia de Santelices fue la Casa de los Navarro. Como consecuencia de los entretelones del Situado de 1750, Isidro Navarro le contaba a Quintana, que la conducta de Santelices "...es incomprensible trayendo a todo el pueblo al resortero, hallándose los vecinos bien desabridos que no se sabe en que pararán sus providencias ni como las recibirá el Gobierno".<sup>5191</sup> Pero luego de la quiebra de la Casa de Navarro, el nuevo apoderado del Presidio de Buenos Aires R.P. Saloguen le reconoce a Quintana en septiembre de 1751

"...que el que exista en la Real Caja lo que ahora se me ha de entregar, se debe al Sr. Ventura Santelices, que impidió por su Decreto el que se entregase cosa alguna del Situado a los Navarros antes de ahora, y que deben esos Sres. Jefes, principales, no sólo dar las gracias a SS, sino informar a SM de la rectitud y justificación de este exemplar Ministro".<sup>5192</sup>

Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de Saloguen, parece ser que Santelices se resintió de la conducta de los oficiales del Presidio de Buenos Aires. El resentimiento de Santelices para con el Presidio habría obedecido en primer lugar a que dichos oficiales no hubieran dado crédito a lo que Santelices les tenía escrito sobre los Navarros. A juzgar por los términos de una carta llena de excusas dirigida por Miguel Antonio de Ezcurrechea al Virrey Manso de Velasco, Conde Superunda el 19 de enero de 1754, quién habría escrito dichos Informes no sería otro que el mismo Ezcurrechea, ex-dueño de un Banco de Plata competidor del de los Navarro, y que Santelices no tuvo más remedio que cerrar. En dicha carta Ezcurrechea le pide al Conde de Superunda "...se sirva dispensarme los deslices que pude tener en correr la pluma con fervor en los citados Informes, que fueron nacidos del afecto de buen vasallo, y hablar claro a los soldados [del Presidio de Buenos Aires y la Expedición de Límites]".<sup>5193</sup>

En segundo lugar, dicho resentimiento habría obedecido a la ingratitud que demostraron los oficiales del Presidio de Buenos Aires luego de descubierto el fiasco de la Casa Navarro, al no merecer ni siquiera una carta de agradecimiento por haber contribuido a que las Cajas Reales no entregasen más plata del Situado a los Navarro. Esta ingratitud se manifestó en febrero de 1752 debido a dos circunstancias: La primera y la más personal "...porque no les mereció en su pasaxe la más mínima atención de oferta de si se le ofrecía algo". La segunda circunstancia "...porque estos oficiales del Presidio no hacían el servicio de Su Majestad siendo los agentes de los contrabandos que de la otra banda [Colonia del Sacramento] se metían en esa Ciudad".<sup>5194</sup> En efecto, dichos Capitanes del Presidio eran quienes hacían la vista gorda cuando los comerciantes residentes en Buenos Aires (Manuel del Arco, Miguel Ezcurrechea, Álvarez Campana, Roque de San Martín, Antonio de Guzmán, Carlos de los Santos Valente, Manuel de Olivera Braga, Bartolomé J. de Quiroga, y Francisco Pérez de Saravia) introducían mercadería ilegal desde la Colonia del Sacramento.<sup>5195</sup> Esta última circunstancia, alegada por Santelices, se compadecía plenamente con la Real Orden del Marqués de la Ensenada dirigida el 28 de Julio de 1748

al Virrey del Perú Conde de Superunda, en la cual se ordenaba adoptar precauciones tendientes a evitar el paso clandestino de caudales hacia la Colonia del Sacramento.<sup>5196</sup> Entre esas precauciones, el Gobernador del Río de la Plata José de Andonaégui aplicó mediante el bando del 20 de noviembre de 1748 la decisión del Virrey del Perú de suspender la internación de los enjunques hasta que fuese vendido el fierro, acero y ferretería introducido por la Real Hacienda.<sup>5197</sup>

Las argucias esgrimidas por Santelices para obstaculizar la remisión del Situado a Buenos Aires le hacían decir en abril de 1752 al mismo Saloguen --quien como vimos se había visto al comienzo bien impresionado por la conducta de Santelices-- en carta a Quintana que "...este Caballero sólo emplea sus talentos en enredar a todos, vendiéndoles ofertas de palabra, practicando todo lo contrario de lo que ofrece".<sup>5198</sup> La persistente conducta obstaculizadora de Santelices respecto al Situado de Buenos Aires habría obedecido a su interés por otras prioridades. Estas prioridades no serían otras que el rescate de las barras de Oro, las cuales debido a la quiebra del Banco de Iribarren no tenían comprador. En carta a Quintana, Saloguen le expresaba en abril de 1752:

"...Este Caballero que tanto ofrece favorecer a ese Presidio, quiere con la Plata del Situado rescatar las Barras de Oro, y las Piñas de esta Rivera, pues habiendo por su causa, cerrado el Banco de Plata Don Pedro Iribarren, no ay otro que el de la Compañía de Azogueros y este se halla sin bastantes fondos para el rescate y Mercancía".<sup>5199</sup>

#### **Q-IX Las desavenencias acerca del Situado.**

Las desavenencias acerca del Situado entre los apoderados del Presidio de Buenos Aires y el Visitador Santelices se prolongaron en el tiempo. En Septiembre de 1752 Saloguen S.J. le manifestaba a Quintana "...que este Caballero me puso todos los Caves [sic] que una perversa intención puede discurrir a fin de aburrirme en la cobranza del último Situado que salió de aquí".<sup>5200</sup> En su empeño por boicotear la gestión del apoderado del Presidio de Buenos Aires, el Caballero Santelices, a juzgar por lo que Saloguen manifestaba a Quintana, no paraba en escrúpulos pues "...su malignidad llegó a quererme desacreditar, y aún publicó que escribiría al General de la Compañía, para que me obligase a renunciar los Poderes de ese Presidio".<sup>5201</sup> Para evitar esta campaña Saloguen aconsejaba "...recurrir a S.M. proponiéndole lo que ha ejecutado este Caballero, y lo que en adelante se espera de él, para que ese Presidio no experimente atraso en sus pagos". Este objetivo sólo se podría lograr "...inhibiendo a este Caballero de que entienda en punto de Situado, y por inmediato debe V.S. hacer esta representación al Exmo. Sr. Virrey".<sup>5202</sup>

La animadversión del apoderado del Presidio contra Santelices se extendió, luego de la muerte de Saloguen, al nuevo apoderado Juan Francisco Uzal. En carta escrita a Quintana, Uzal le escribía en Junio de 1753 que la curiosidad y la malicia de Santelices lo obligaban a practicar ciertas "trampas que no lastimaban la conciencia", pues "...este hombre...hasta las conciencias quisiera escudriñar".<sup>5203</sup> El mismo Santelices en una carta anterior dirigida en enero de 1752 al Gobernador Andonaégui expresaba que "...convendría mucho que el Padre Saloguen aga sus remesas por tercios, y que ni a él ni a otro que le suceda se le consienta por ese Presidio la menor demora en ejecutarlo así por que la Plata tiene aquí más amancebados que en otras partes por el uso que se puede hacer de ella en cualquiera dilación de remitirla".<sup>5204</sup> En una carta anterior Uzal le advertía a Quintana que

"...las raterías y nimiedades de este Ministro nos a dado mucho que sufrir, y es capaz de provocar a un Santo...porque en todo se quiere meter y mandar, y es preciso aguantarlo".<sup>5205</sup> Pero en su nueva urgencia por enviar el Situado cuanto antes, Santelices descuidaba la calidad de la moneda con que debía ser enviado, integrándolo casi exclusivamente con moneda sencilla, cuando debía serlo con moneda doble.

Era tal el control que ejercía Santelices de la remisión del Situado que también obligaba al apoderado del Presidio de Buenos Aires a buscar fiadores para fletar el mismo. Ello le hacía decir también a Uzal en carta a Quintana, de agosto de 1754, "...a todo esto obliga la cicatería y celo indiscretísimo de este Hombre inaguantable, de quien otros dirán bastantes cosas que parecen increíbles, pero las sufrimos, porque así lo permite Dios que sea azote de Potosí".<sup>5206</sup> La desconfianza de Santelices por todo lo que proviniera de Buenos Aires lo inducía a tener a todos sus vecinos "...por malos vasallos". Esta actitud de Santelices lo lleva a Uzal a decirle asimismo a Quintana que "...si el Presidio no consigue del Sr. Virrey el que este Ministro no tenga intervención alguna en el Situado...no habrá hombre de vergüenza que sufra a este caballero que sólo piensa en el daño del prójimo".<sup>5207</sup> No seguro del énfasis puesto en su carta, dos semanas después, Uzal le insiste a Quintana, "...a fin de que este hombre no tenga intervención con el Situado, pues cada día ha de salir con nuevos reparos, según su genio caviloso dispuesto a creer cualquier especie que cuadre a su malicia".<sup>5208</sup>

Presumiblemente Santelices, en su premura por enviar el Situado cuanto antes, no comprendía o no quería comprender que el Presidio de Buenos Aires esperaba sólo moneda doble y rechazaba la sencilla. En carta dirigida a Quintana, el 17 de julio de 1754, Uzal le expresaba que Santelices "...no atiende a que la Plata que va para el Presidio llega allá cuando ya la tienen gastada los soldados supliéndosela los [comerciantes] que esperan compensación en la doble, cuando llegue". De no ser de esta manera, "...no hallaría el soldado quien le socorriese su necesidad".<sup>5209</sup> Entre otras medidas, Santelices había proyectado rebatir \$3000 en la mitad del sueldo de un año. Pero esto a juicio de Alonso de la Vega, Marcos Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo en carta al mismo Santelices de 18 de octubre de 1754 "...es lo mismo que quitarle al mercader el único aliciente que tenía para adelantar el socorro al soldado. Sin éste [aliciente]...es lo mismo que abandonar [la tropa] por nueve meses o más".<sup>5210</sup>

Al parecer, una vez fallecido Ezcurrechea, Santelices lo sustituyó en su condición de Asesor con la persona de Miguel de Salcedo, el ex-Gobernador de Buenos Aires. En carta escrita en noviembre de 1754 al Gobernador de Buenos Aires Andonaégui, Juan Francisco de Urtubey le informaba que Santelices "...sigue los dictámenes errados de Miguel de Salcedo por lo que se halla la Villa caminando a su ruina".<sup>5211</sup> Los reiterados reclamos de los apoderados del Presidio para emanciparse de la tutela de Santelices parecieran haberse coronado con el éxito recién a fines de 1754. En la carta dirigida a Quintana de diciembre de 1754, Uzal revela que Santelices contestó el 14 en forma

"...disimulada y cautelosa,...no conviniendo la paz y tranquilidad que en ella muestra, con la arrogancia y autoridad que se atribuye en el sobreescrito,...no constando sea mas que Corregidor, Visitador de la Caja, y Superintendente de la Casa de Moneda y Mita".<sup>5212</sup>

Pese a la cautela y disimulo mostrada en su carta, Santelices "...no sabe todavía la Providencia favorable que nos vino de S.E. [el Virrey], que fijamente nada le avisó, ni hace caso de él para la paga del Situado, que es lo que pretendemos".<sup>5213</sup>

Con el tiempo, el Presidio de Buenos Aires dejó de nombrar apoderados, y como por una Real Cédula, tenían facultad los Oficiales Reales de las Cajas de Potosí para hacer por sí solos el pago del Situado, "sin necesidad de Libramentos del Superior Gobierno", comenzaron los Oficiales Reales mismos a nombrar situadistas a su arbitrio. Este nuevo cambio volvió a exponer el aparato del estado colonial al influjo del cohecho y el soborno, para cuyo remedio el Gobierno de Lima acordó por auto del 16 de octubre de 1760

"...que ofreciéndose conducir dinero o efectos de cuenta del Rey, para Buenos Aires u otra parte, se pregonase y sacara a remate, para que los conduzca bajo de fianzas correspondientes el que hiciese mayor beneficio, para evitar colusiones".<sup>5214</sup>

De todas maneras, habiendo fallecido el Virrey de Lima, Conde de Superunda en 1761 Santelices perdió influencia y debió renunciar a su cargo, con lo que las defraudaciones y las estafas volvieron a sus andadas, afectando nuevamente a los Situados. En 1761 Alonso Bernardo de León, un comerciante con mercaderías consignadas a su orden, sustrajo en su condición de Conductor de un Situado \$137.938 pertenecientes a la Carta Cuenta de las Cajas Reales de La Paz.<sup>5215</sup> Este Situado estaba destinado a la Villa de Puno, donde dicha cantidad debía ser reducida a barras, para luego ser conducida a Lima por la vía de Arequipa, y ser entregada a Don Francisco Morales, Receptor del Santo Oficio de la Inquisición.<sup>5216</sup> Sin embargo, León derivó el Situado a Oruro, donde luego de reducirlo a barras, enfiló para Buenos Aires con probable destino final en la Colonia del Sacramento. En palabras del Conde de San Isidro "...León condujo su persona desde La Paz a Oruro, y desde Oruro a Buenos Aires extraviando caminos y en calidad de ladrón, lo que no se hace sin extraordinarios costos (es imposible que con menos de \$2.500 hiciese este viaje)".<sup>5217</sup> No obstante su fuga, León fue capturado, merced a los informes enviados desde Santiago del Estero por el Conductor oficial del Situado Juan Tomás de Zegada. Este último, previno a las autoridades para que en caso que los conocimientos por \$51.000 dobles, firmados por Bernardo Sancho Larrea y recibidos por él como Situadista, pertenecieran a León

"...mande V.m.d. chasqui acelerado a Buenos Aires a Don Eugenio Lerdo de Tejada pues es factible espere el dicho León al Situado para recibir la plata, o a lo menos cuando aiga tenido noticias de que van tras de él, dicho Lerdo sepa donde para, para aprehender su persona".<sup>5218</sup>

Aprehendido finalmente, y divulgada la noticia de su prisión, Don Faustino Solís y Don Eugenio Lerdo de Tejada manifestaron ciertos tejos de oro y moneda doble que León les había puesto en su poder. En su confesión León declaró que "...la plata doble y los tejos de oro que tenía eran comprados y reducidos con el dinero del Rey, que recibió en la Caja de La Paz [en moneda sencilla".<sup>5219</sup> Recogidos los caudales sustraídos, los Oficiales Reales alcanzaron a recaudar, incluidos los remitidos a sus acreedores particulares, la suma de \$94.074, restando para completar la Carta Cuenta \$43.874. Bartolomé J. de Chávez, apoderado de los acreedores, declara que "...lo que de él pudo recaudarse no alcanzaba a cubrir lo que los acreedores entregaron [a las autoridades], y este es el descubierto, que hasta ahora están persiguiendo los Oficiales Reales".<sup>5220</sup> A pedido de los acreedores, la

moneda doble que se recogió debía ser reducida a sencilla "...vendiendo con el maior adelantamiento el oro que le embargaron, para que engrosado con este beneficio aquel caudal, huviese más sobrante a fauor del concurso".<sup>5221</sup>

León había sido designado Conductor del Situado por su propio suegro Don Andrés Díez de Medina, "...quien conociéndose principal obligado, puso su persona en una Iglesia para evitar la ejecución".<sup>5222</sup> Aparentemente, si bien Díez de Medina se había hecho responsable ante las Cajas Reales por el Situado, no era cómplice de su yerno en la sustracción, por cuanto denunció la fuga de éste y luego, a juzgar por las expresiones de Chávez, "...procedió como hombre de bien a descubrir el hurto".<sup>5223</sup> Esta actitud le valió a Medina "...que lo dejen libre de la sustracción sin perjuicio de la deuda del Rey, que como obligado reconoció siempre en sus pedimentos".<sup>5224</sup> Pero para Chávez, no sólo Medina era inocente de hurto alguno, sino también León, pues "...éste [León] juzgaba que su suegro debía darle una dote más crecida de la que le dió".<sup>5225</sup> Viendo que Medina se obligaba en la Caja Real de la ciudad de La Paz por la cantidad que remitían los Oficiales Reales, León "...quiso lograr la ocasión de aprovecharse de todo lo que le faltaba para completar su dote con aquel caudal que estaba obligado el suegro a entregar en Lima".<sup>5226</sup> Con este ánimo, León remitió separadamente a sus propios acreedores lo que estaba en su poder del producto de las ropas que comerciantes de Lima le habían consignado, "...y emprendió la fuga con parte de la plata del Rey, dejando a Don Andrés para que la repusiese".<sup>5227</sup> La lenidad con que Chávez juzgaba a León habría obedecido a la influencia interpuesta por el fuerte comerciante porteño Bernardo Sancho Larrea. Según el testimonio brindado por Zegada, León había mandado "...por mano de Larrea...una barra a Potosí a la Real Casa de Moneda para que las redujese a plata y me la entregase a mí".<sup>5228</sup> Zegada le prevenía al juez de la causa que le tenía firmados a Larrea conocimientos por valor de \$51.000 en moneda doble para entregar en Buenos Aires a Eugenio Lerdo de Tejada.<sup>5229</sup> Mis sospechas de que Zegada se hallaba en lo cierto y de que Larrea estaba complicado en el desfaldo se fundan también en el hecho de que veinte años después, siendo Larrea ya un hombre maduro y habiendo sufrido cárcel en Malvinas por haber solicitado la continuidad del Virrey Cevallos, se lo halló complicado en un grueso contrabando.<sup>5230</sup> Con relación a la responsabilidad que le cupo en este fraude a Díez de Medina, Chávez hallaba que aquél, por estar obligado a la Real Hacienda, también lo estaba a los acreedores, pues "...tuvo la culpa de que su yerno se alzase con la Carta Cuenta al confiarle la conducción, y permitió que saliese a reducir a barras el caudal que los Oficiales Reales le entregaron en monedas".<sup>5231</sup> Finalmente, como resultado de esta defraudación a Díez de Medina le fue embargado la totalidad de su patrimonio rural.<sup>5232</sup> Y su yerno, el reo León, alias Juan Rodríguez Hidalgo, pudo fugar de la cárcel con la ayuda de su cómplice Bernardo Sancho Larrea, quien le dio libranza de \$34.000 a cargo de Eugenio Lerdo de Tejada. Por dicha complicidad Larrea fue arrestado en la cárcel pública.<sup>5233</sup>

## **Q-X El control de la evasión fiscal.**

Erigida la Caja de Buenos Aires en 1778 en Caja matriz del nuevo Virreynato del Río de la Plata, como lo era antes la de Lima, el control de la evasión fiscal pasó a Buenos Aires, el corazón del virreinato, y la remisión de los caudales del Real Erario no lo fueron más por razón de situado, sino como sobrante de las Tesorerías de las Provincias arribeñas "...para que allí [en Buenos Aires] se depositen y vuelvan a circular por el Reino, como dispuso la naturaleza con la sangre del cuerpo humano respecto del corazón".<sup>5234</sup> Para evitar malversaciones de los caudales reales, las Leyes de Indias mandaban que cuanto caudal enviaban los Oficiales Reales de una Caja Real a otra fuere remitido consignado a

los Oficiales de la otra Caja, bajo pena del 4% y perdimiento del oficio si hicieren el envío de otro modo. Por estas transgresiones numerosos Oficiales Reales en toda la América colonial fueron denunciados y procesados. El Río de la Plata no estuvo exento de estos casos de malversación dado los altos premios que se pagaban por el uso del dinero prestado. Tomás Antonio Romero, el conocido comerciante y situadista residente en Buenos Aires, denunció en marzo de 1787 al Superintendente de la Real Hacienda que Gaspar Lozano y Rafael Castellanos, Contador y Tesorero de la Real Caja de Córdoba "...se han hecho delincuentes...por haber incurrido en la pena de confiscación de bienes, privación de oficio y destierro por diez años a los Ministros que negociaren con hacienda del Rey".<sup>5235</sup> En efecto, Lozano y Castellanos hicieron una remesa de Córdoba a Buenos Aires de 4000 pesos fuertes. Para ello, ambos Ministros habían reducido los caudales de moneda sencilla a moneda doble "...con sólo el descuento del 1% que costó la reducción, resultando a su favor en el envío un 2%, que quedaba del 3% con que previenen haga el entero por ser notorio y moralmente imposible que se ignore que este premio tiene en esta capital la plata fuerte".<sup>5236</sup> Según Romero, quien había sido Situadista por subasta real, los Oficiales Reales debían recibir los derechos en la mejor plata posible y no se debían apropiar de las sobras de caja, "...entre las cuales no cabe duda que se debe comprender este aumento de premios".<sup>5237</sup>

#### **Q-XI La malversación de los caudales reales y privados.**

La malversación de los caudales reales continuaron hasta el mismo filo de la revolución. Don Tomás Villota, Asentista del Situado Real, declara en 1807 que Don Indalecio Gonsález de Socasa había despachado desde Potosí un situado real con \$200.000, por medio del Conductor Don Gabriel Cuñado.<sup>5238</sup> Detenido Cuñado en Tucumán por haberse anoticiado que Buenos Aires había sido tomado por los Ingleses, cometió la criminalidad de ponerse a jugar a los naipes y perder en la partida. Informado del hecho Villota, dio orden a Don Juan Félix Ezcurra, vecino de Santiago del Estero, y yerno del Ministro de Real Hacienda José Antonio López de Velazco, para que pasase al Tucumán, tomase cuentas a Cuñado, se recibiese del caudal, y lo bajase a Buenos Aires,

"...respecto a que no era prudencia fiar el cuidado de los reales intereses de un hombre [Cuñado] que había caído en tal desgracia,...debiendo sí presumir racionalmente que siguiese en el criminal exceso en que había incurrido, y fuese total la pérdida".<sup>5239</sup>

Recibido Ezcurra de los caudales del Rey, llegó a Buenos Aires en carretas, con el dinero que se había logrado recuperar de manos de quienes le habían ganado en el juego a Cuñado. Si bien Ezcurra estacionó las carretas frente al fuerte no se presentó en las Cajas Reales como era su deber. Esta ausencia u ocultación que hizo de su persona produjo la presunción de que el caudal del Rey que recibiera en Tucumán de manos de José Gregorio Aráoz no estaba íntegro "...por haber tomádolo él para algunos usos que habrá querido arbitrariamente".<sup>5240</sup> Esta presunción se confirmó luego, al contarse el dinero y descubrirse la falla.

Amén de los desfalcos sufridos por los situados reales, los situados privados se veían también periódicamente expuestos a desfalcos. En la larga denuncia formulada en 1799 por el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo contra diversos funcionarios avecindados en la ciudad del Tucumán, las concretadas contra el Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y simultáneamente conductor de los caudales del Rey Mariano

Soloaga revisten especial relevancia por cuanto aquel se preguntaba "si habiendo sido nombrado Conductor de los caudales del Rey, le entregó baxo la confianza pública 12.000 pesos Don Miguel Amatller y Brancos, comerciante de Potosí, para que los emplease en efectos en esta capital y se alzó con ellos", si habiéndose alzado con este dinero, y simulado a Amatller que estaba haciendo negocio, y que para consumarlo con un buen surtimiento necesitaba \$4.000 más, se alzó también con estos, después que aquel se los remitió", si habiendo "...pasado personalmente Amatller a cobrar este dinero a esta Capital lo encontró en Córdoba donde lo prendió y si habiendo baxado ambos a esta Capital se compuso baxo de fianza", si habiéndose "...habilitado por influxo de los mismos fiadores con factura de efectos de Castilla se alzó también con esta en Salta y Jujuy para pagar a Brancos, dejando en total descubierto a sus acreedores", y finalmente, si habiéndose "...nuevamente habilitado con la Administración de Tabacos del Tucumán se alzó con todas las existencias del Rey para acabar de pagar a Brancos y demás acreedores".<sup>5241</sup> También la corona subvenía, mediante confiscaciones impuestas a los situados privados, los ingentes gastos guerreros a que la obligaba la situación Europea. Mas a partir del momento en que al fisco le entró a llegar plata de la Aduana de Buenos Aires misma, dejó de recurrir a este impopular expediente. En carta de Jayme Alsina a Carlos Camuso, de marzo de 1809, aquel le manifestaba a éste último, con expresiones suficientemente ilustrativas que

"...desde que ay tormenta en esta ciudad no a venido situado alguno con plata de particulares nada le puedo decir aunque me parece que el Virrey ya no echará mano aunque venga, porque va entrando alguna plata de la Aduana y mas ramos de la Tesorería,...[con lo cual] me parece que no abrá necesidad de echar mano de la plata ajena".<sup>5242</sup>

## **Q-XII El control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí.**

Con la erección del Consulado de Buenos Aires en la década del 90, su Junta de Gobierno entró a controlar las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí, en lo que respecta a la elección del conductor del Situado, haciendo más improbables desfalcos como los ocurridos en las décadas del 50 y 60. Esta Junta había aprobado un Reglamento de situados con 17 puntos en donde se estipulaban los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.<sup>5243</sup> De flete el situadista cobraba entre 1/4% y 1/2% del valor de la remesa ganando de \$1500 a \$4000 en cada viaje. La condición más objetada por el Consulado de Buenos Aires era la de que los situadistas debían ser oriundos o residentes de Potosí. Esta cláusula generó toda suerte de animosidades en los comerciantes de toda la carrera entre Potosí y Buenos Aires, precipitándose finalmente el conflicto en el seno de la misma Junta de Comercio potosina. Por un lado se hallaban los seguidores de Indalecio González de Socasa, y por el otro un grupo liderado por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza, sobrino del José de Endeiza que fuera ajusticiado por los indios en la rebelión de Tupac Amaru. Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal en Porco, habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí. El poder de Socasa descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de Ugarteche y entre los Potosinos se contaban Manuel Bulúcia,<sup>5244</sup> Juan Bautista Elorreaga,<sup>5245</sup> Nicolás Ponte, Nicolás de Oliden,<sup>5246</sup> Francisco Senavilla,<sup>5247</sup> y Joaquín Obregón, éste último socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre

los porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz Valiente,<sup>5248</sup> Juan Estéban de Anchorena, Domingo de Ezcurra,<sup>5249</sup> el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro, y Martín de Gainza, éste último Subdelegado del Partido de Atacama. Ybieta en tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios Gregorio Barragán,<sup>5250</sup> y Joaquín de la Quintana,<sup>5251</sup> los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,<sup>5252</sup> y Domingo Antonio de Achával;<sup>5253</sup> los mercaderes porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,<sup>5254</sup> Manuel Alejandro Obligado,<sup>5255</sup> Ramón de Aramburu Zavala,<sup>5256</sup> Juan Gonsález y Torres y José Miguel de Tagle;<sup>5257</sup> y los comerciantes minoristas Antonio Gonsález de Ortega, Gerónimo Tudó,<sup>5258</sup> y Miguel de Amatller.<sup>5259</sup> Ybieta era un comerciante acostumbrado a operaciones de gran cuantía, dado que entre 1783 y 1800 llevaba contraídas en Buenos Aires siete operaciones de fiado por valor de \$105.000 con comerciantes de la talla de Juan Antonio de Lezica y Domingo Antonio de Achával.<sup>5260</sup> Por el contrario Socasa se había iniciado en el comercio en calidad de mozo de José Ramón de Ugarteche, y fue acusado por Ybieta de "...andar menudeando cintas, hilos, y ropa de la tierra, y otros artículos de este jaez por las inmediaciones del Cuzco, La Paz, y Valle de Sinti".<sup>5261</sup> El motivo que dio lugar al conflicto fue la violación del propio Reglamento de Situados citado, por parte de una facción de comerciantes encabezados por Indalecio Gonsáles de Socasa, al reelegirse como vocales a quienes aún no habían pasado el hueco, o sea los dos años fuera del cargo requeridos por el Reglamento.<sup>5262</sup> En palabras postreras de Pedro Vicente Cañete, quien antes había apoyado a la facción de Socasa, la causa del conflicto era el

"...continuar perpetuándose en la Diputación de la Azoguería dos de los que fueron separados por igual abuso el año 1801, que después han sido reelegidos, antes del hueco, que mandó guardar la superioridad, y no han cesado, como debieron cesar por enero, de este año, en que correspondió hacer nuevas elecciones, conforme a la Ordenanza 3, título 6, del Reglamento del Banco".<sup>5263</sup>

La deuda acumulada por el Gremio de Azogueros para con la Real Hacienda también le hacía pronunciar a Cañete en 1804 que

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el lujo escandaloso de sus casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".<sup>5264</sup>

Es evidente que este conflicto no resuelto socavó la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

## Índice

- R-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial
- R-II Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas.
- R-III Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz.
- R-IV Recaudación del diezmo.
- R-V Manipulación de las guías de aduana.
- R-VI Contrabando o desdoblamiento del orden legal.
- R-VII Discriminación de los comerciantes entre sí.

### **R-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial**

Aunque persuasiva, la tendencia revisionista padecía, para Pietschmann (1982), Andrien (1984), Domínguez (1985), y el que suscribe, en tres artículos publicados entre 1984 y 1985, de severas limitaciones, pues las prácticas corruptas no eran implementadas sólo por quienes gobernaban, para impulsar una determinada política económica o meros objetivos personales, sino también por quienes, como integrantes de una emergente burguesía comercial local, se sirvieron de ellas para volcar el equilibrio del poder en su propio beneficio, y en última instancia, en favor de un proceso de emancipación política, que se concretó recién en los inicios del siglo XIX.

Pero si para investigar este último proceso de crisis e insurrección nos reducimos a analizar la estructura política, con exclusión de la esfera puramente económica, debemos concluir también en la importancia que significa estudiar la capacidad política de un estado para movilizar recursos humanos y materiales con que defenderse de las amenazas externas. Es en ese sentido, que el mejor indicador de los cinco que menciona Wallerstein (1980) para medir el consenso político vigente en las colonias es la capacidad del estado de continuar recaudando recursos con que impulsar la defensa militar contra la amenaza naval inglesa, a un costo tal que no absorbiera las ganancias de la burguesía comercial local dominante.<sup>5265</sup> En este trabajo nos proponemos estudiar las prácticas corruptas que devoraban las recaudaciones fiscales (alcabala, sisa, etc.). Si los costos de esta recaudación, insumido por las prácticas corruptas (evasión fiscal), devoraba las eventuales ganancias sería evidente la incapacidad del estado de mantener sus colonias dentro de márgenes que no volvieran su administración ineficiente y costosa. Tanto Pietschmann (1982) y Andrien (1984) como el que suscribe, perseguimos entonces, examinar no sólo cómo los miembros de un aparato burocrático abusaron de los poderes legales sino también cómo el abuso de los poderes legales por parte de una emergente burguesía comercial local ayudó a socavar el aparato del estado colonial. Para examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación colonial en América es preciso entonces explorar no sólo aquellos cargos públicos donde no se contemplaban mecanismos racionales de reclutamiento de sus miembros, si no también aquellos otros cargos públicos donde sí se contemplaban, pero donde la venalidad superaba cualquier salario que la corona podía otorgar, o como en el caso de los consulados, se contemplaban mecanismos eleccionarios en la selección de sus integrantes.

Es preciso entonces, para superar estas limitaciones, preguntarse en qué grado toda corrupción administrativa contribuyó a gestar una burguesía comercial local y a generar las

condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario. Para ello deberemos distinguir las diversas definiciones de los actos considerados como corrupción. Para Heidenheimer (1970) existen tres definiciones de conducta corrupta: 1) las centradas en la función pública, 2) las centradas en el mercado, y 3) las centradas en el interés público. Las primeras se refieren a la violación de la confianza pública puesta en el funcionario, que incluirían según Pietschmann (1982) al cohecho o soborno; al nepotismo, favoritismo, o clientelismo; y al desfalco, quiebra o malversación de los caudales públicos. Las segundas se refieren a la situación en que el funcionario considera la posición como una jerarquía en la cual maximizar individualmente ganancias privadas al dispensar servicios públicos, adquiriendo venalmente el oficio en cuestión. Esta definición de corrupción implicaría un cambio de un modelo de precios fijados compulsivamente a un modelo de precios fijados libremente en el mercado. Las terceras enfatizan la violación del interés común en favor de intereses especiales que proveen beneficios directos o indirectos a los funcionarios gubernamentales. La evasión del pago de los impuestos internos, tales como la saca ilegal de plata sin sellar ni registrar, y de cueros sin marcar, así como la introducción ilegal de géneros Europeos, esclavos del África, y tabaco del Brasil, entrarían en la tercera definición de corrupción, a la cual está dedicado este trabajo. Para Pietschmann (1982), las dos últimas definiciones de corrupción serían las más funcionales para comprender el fenómeno de la corrupción latinoamericana colonial al no limitar las definiciones al aparato burocrático secular y extenderlo por el contrario a toda la sociedad civil y eclesiástica. A ello agregaríamos nosotros, que también debería extenderse el fenómeno de la corrupción a las mismas relaciones intra-familiares. Más aún, para el que suscribe, la primer definición -aunque equivocada en cuanto iguala a la corrupción con el nepotismo- sería la más funcional para comprender las motivaciones individuales y colectivas que engendraron el proceso revolucionario, mientras que la tercer definición sería la más funcional para explicar la emergencia de una burguesía comercial local que en última instancia dio lugar también a la gesta revolucionaria. Pero para Nas, Price, y Weber (1986), que analizan la corrupción administrativa en el estado contemporáneo, lo que está faltando en la literatura especializada es un mecanismo sistemático que ligue las causas de la corrupción con las consecuencias para generar alternativas válidas de políticas públicas. En el caso de las colonias españolas de América, por más que la mercancía importada por un comerciante local en su territorio haya sido fruto de un tráfico interlope no constituía por ello un acto de un típico comerciante burgués. Para que ello ocurriera el acto ilegal debería a nuestro juicio haber competido ventajosamente con el monopolio gaditano, alentado el comercio inter-colonial, y contribuido a ampliar el ritmo de la acumulación de capital local. Esto pudo haber sido logrado si el fruto del acto ilegal hubiera constituido un insumo irremplazable con el cual agregar valor a la mercancía producida (e.g.: el acto de importar azogue y almadanetas para los ingenios de moler metal, o el acto de importar toneles para envasar carne salada a exportar, constituyen actos típicos de una burguesía exportadora).

Más aún, las actividades ilegales como el contrabando, a juicio de Assadourian (1983), no dinamizan ni incitan al crecimiento de los sectores externos regionales, mantienen la tendencia al consumo suntuario del grupo social dominante, agudizan la tendencia descendente de los precios, y constituyen un elemento disruptivo al desarticular la estructura de los circuitos comerciales externos e internos.<sup>5266</sup> Últimamente, Imbernón (1986) y Camacho (2004) lograron romper con las crónicas disputas entre spenglerianos y revisionistas y fueron capaces de concebir el contrabando en primera instancia como un contacto con el mundo extra colonial y en segunda instancia como una circulación ilícita tanto de productos foráneos como de productos locales pero ilegales.<sup>5267</sup> Es en ese sentido

que pienso en este trabajo explorar esa realidad que tanto angustió y sigue angustiendo a generaciones de intelectuales y políticos del mundo colonial y post-colonial.

## **R-II La discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas.**

En primer lugar, la actividad ilícita más considerable en perjuicio de la Real Hacienda se cometía al amparo de la política fiscal colonial que discriminaba los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas, al exceptuarlas del pago de los derechos correspondientes a la primera venta. Estas actividades ilícitas o defraudaciones adquirían mayor volumen al interior del espacio colonial, donde el control de las autoridades centrales se hacía más aleatorio. Ya en 1736 Gaspar de Bustamante, en nombre del Real Derecho de Alcabala, le inicia una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba, cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires procedentes del Paraguay.<sup>5268</sup> Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos testimonios incluidos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su Curato", por excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfacción de este y los demás derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar los derechos reales como legos".<sup>5269</sup>

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruiloba provenían de los ingresos que le había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruiloba a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie que le diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruiloba "redujo sus dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.<sup>5270</sup> Por si esto fuera poco, el Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] en Potosí".<sup>5271</sup> Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por \$4.877, otra en 1734 con Francisco Huidobro por \$5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por \$2500.<sup>5272</sup>

## **R-III La discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz.**

En segundo lugar, la evasión fiscal más generalizada se cometía pese a la política fiscal colonial que discriminaba en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, y en contra de los mercaderes locales y los empresarios sustituidores de importaciones. A diferencia de los dueños y arrendatarios de minas e ingenios productores de plata y oro para exportar, que solían gozar de exenciones fiscales tales como el pago del quinto real, aquellos otros contribuyentes establecidos en los puertos de entrada, que

producían y distribuían artículos que competían con la introducción de manufactura metropolitana, como ser los maestros herreros dueños de fraguas y productores de frenos, espuelas, y herramientas de la industria minera (azadones, barrenas, barretas, almadanetas, combas, espadillas, y varillas) se veían aplastados no sólo por la competencia de los precios de la manufactura importada sino también por la persecución fiscal para el pago de la alcabala.<sup>5273</sup> Por la naturaleza indirecta de la alcabala su costo se solía trasladar al precio de venta al consumidor. Pero cuando el contribuyente era un productor local cuyo producto sufría la competencia de las importaciones procedentes de la metrópoli, no siempre podía trasladar el costo del gravamen fiscal. En los Autos por cobro de pesos obrados en 1745 por Tomás Antonio Arroyo y Esquivel,<sup>5274</sup> Administrador del Real Derecho de Alcabalas Terrestres, contra Francisco Lillo, un maestro herrero dueño de dos fraguas, Nicolás Lisperguer, testigo en la información levantada declara:

"...que es cierto tienen la tienda los susodichos Lillos abastecida de varios géneros y por el año de 40 o 41 viviendo el sujeto en aquel barrio les oyó decir a los dos susodichos que venderían un día con otro a setenta u ochenta pesos (menudeo diario) y que en esta ocasión estaba el comercio más corriente que ahora y que después se mudó de aquel barrio."<sup>5275</sup>

Arroyo, declara en los mismos autos que:

"...bien justificado está por su mismo dicho el que la venta diaria del menudeo son 70 a 80 pesos pero yo lo regulo prudencialmente a sesenta pesos que en 365 días que tiene el año importan \$21.900 de venta que en los dos años en que se debió recaudar a razón del 4% montaron dichos pesos de venta diaria \$43.800: y su alcabala importa \$1.752 y en los otros dos años últimos del 2% adeudaron a favor del dicho Real Derecho por razón de dicha venta diaria \$876 cuías partidas suman \$3.028".<sup>5276</sup>

Por lo general estaba establecido que a los receptores que administraban las alcabalas terrestres se les asignaba un porcentaje que alcanzaba promedio al 30% de lo recaudado.<sup>5277</sup> Pero cuando en 1746 el Cabildo resuelve arrendar el ramo, quienquiera lo obtuviera debía previamente hacer un cálculo de la capacidad contributiva de la jurisdicción a fiscalizar y tener en cuenta que para poder concretar los enteros anuales a los que se obligaba con las Cajas Reales debía al igual que los antiguos administradores del ramo perseguir denodadamente la evasión fiscal. El cobro del ramo de alcabalas había sido durante el siglo XVII tradicionalmente arrendado en todas las ciudades del Virreinato Peruano a comerciantes particulares, y el precio ofrecido varió siempre según la capacidad contributiva que el ramo poseía en cada ciudad. En Potosí, en 1623, Lope de Bastidas la arrendó en la suma de \$45.000 anuales por el término de ocho años. En La Paz, en 1625, Diego de Bobadilla lo arrendó en \$2000 anuales por el término de tres años. En Oruro, en 1627, Diego Fernán Rodríguez lo arrendó en \$13.000 anuales por el término de cuatro años.<sup>5278</sup> Y en Buenos Aires, en 1664, Mateo de Aliende, a su vez un pulpero, arrendó el ramo en la suma de \$1840 anuales por el término de tres años.<sup>5279</sup> Pero pese a la existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfías quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en subasta pública por \$44.345 el Real Derecho de Alcabala, por el término de cinco años y a razón de \$8869 cada año.<sup>5280</sup>

Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfías se vio precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravamen.<sup>5281</sup> Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo Garfías fue el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfías para detener a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínez, este le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfías, la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".<sup>5282</sup>

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.<sup>5283</sup> En efecto, los apoderados de la testamentaria de Garfías iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Saa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfías enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas". Este argumento fué suficiente para que Garfías se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido". No obstante, Garfías no se dio por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfías "...el decir que de las mismas tiendas, sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".<sup>5284</sup>

Asimismo debió Garfías encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".<sup>5285</sup> Esta excusa parecería haber sido orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfías declara que esta excusa, era "...un entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".<sup>5286</sup> Si bien es verdad que Garfías advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".<sup>5287</sup> La impotencia para auditar a cada vendedor mayorista era reconocida por Garfías al expresar: "...siendo cosas casi inaveriguables el que ayan recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner un sobre-estante a cada uno lo cual es imposible".<sup>5288</sup>

Garfías se agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos

quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".<sup>5289</sup> Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Garfias, en representación de la Ciudad de Santa Fé para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestiona el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan". Entiende Garfias que no basta con cobrar al vendedor de las mulas y que es preciso gravar en su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfias recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".<sup>5290</sup> Mucho después, en 1782, en los autos obrados por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un grave caso de defraudación. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carreta y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".<sup>5291</sup> Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilleto, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado a los Propios este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente están empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".<sup>5292</sup>

Como era de suponer, Estela había sido excluido y separado por los demás Oficiales Reales del manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la Intendencia de la Real Hacienda. Impuesto del hecho, el Gobernador-Intendente de Córdoba Antonio Arriaga no sólo lo declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de reposición.<sup>5293</sup> El Cabildo compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don José de Allende y Losa y Don Francisco Hurtado de Mendoza,<sup>5294</sup> resistió su reposición, no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela ofreciera. Pero el caso era que en aquel Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los Tribunales superiores".<sup>5295</sup> Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, Santiago, y José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el Alcalde de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz, casados estos últimos con dos hermanas hijas del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrinas de los dos primeros regidores mencionados; el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz, consuegro de un tío de las esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; el Procurador General de la Ciudad Don Francisco José de Uriarte, con cuñado del Coronel Santiago de Allende y Mendiola; y los regidores Don Prudencio Gigena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del cuarto grado, unos por afinidad y otros por sanguinidad y parcialidad".<sup>5296</sup> Como se comprenderá

"...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque ellos tienen, puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de aquella Ciudad, anualmente se ve entrar y salir todo el mando y poder de aquella

ciudad de unos parientes en otros, entre ellos turna y entre sus manos se gastan las varas, mas no se atienden las resoluciones del Soberano".<sup>5297</sup>

No se diga, alegaba Estela, que en Córdoba no había otros vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".<sup>5298</sup>

También observaba con asombro en 1786 el Ministro Tesorero de Real Hacienda Don Gabriel Güemes Montero,<sup>5299</sup> al Gobernador Intendente del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de Sisa y Alcabala practicaban.<sup>5300</sup> Esta realidad, muy probablemente haya quebrado su moral, por cuanto en 1802, un numeroso grupo de vecinos de Salta,<sup>5301</sup> al dar cuenta de serios casos de corrupción, mencionaba el caso de dicho Ministro, quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero se inviernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, y primo de su mujer, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo.<sup>5302</sup> Asimismo, la impresión que Don Rafael María Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey en 1791 tenía con respecto al partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una corrupción generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".<sup>5303</sup> Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".<sup>5304</sup> Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores".<sup>5305</sup> De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".<sup>5306</sup> También era negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la administración del ramo de Alcabalas de la provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que

"...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados y mulas que allí se consumen, y expenden, ni de otros diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio está muy propagado en La Rioja y su jurisdicción con el aumento que han tomado los salitres, que se benefician y se extraen para dicha Capital".<sup>5307</sup>

#### **R-IV La recaudación del diezmo.**

De parecida mezquindad resultaba también la recaudación del diezmo. Con todo, el diezmo de granos solía ser más recaudable que el diezmo de cuatropea. Este último, ofrecía mayores problemas, según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y además caer en tiempo oportuno ya que, habitualmente, los hacendados

encontraban siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las epidemias, los cardos, o las pariciones.<sup>5308</sup> El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho tributo. En el caso de Santa Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y que al año siguiente, los réditos de aquel principal con el producto del noveno y medio, se pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un fondo considerable, para la fundación del Hospital".<sup>5309</sup>

Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no exigieron al cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una cantidad considerable".<sup>5310</sup> Pero nombrados como Procuradores Generales José Ignacio Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez después, se empezó al menos a indagar el monto de lo adeudado por los principales contribuyentes del Ramo, entre ellos Melchor Echagüe, dueño de estancias en la Costa del Añapiré, quien debía más de \$3.000 al Ramo.<sup>5311</sup> Sin embargo, al ver los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían contrastar, tuvieron poder para conseguir la revocación [del Auto], con lo que cesó la persecución [de los recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".<sup>5312</sup> Si bien antes y después ha habido Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores, como en el día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus enfermedades".<sup>5313</sup>

#### **R-V La manipulación de las guías de aduana.**

Amén de los derechos del Ramo de sisa y alcabalas, los comerciantes del interior solían defraudar al fisco manipulando las guías de aduana. El mecanismo más común era sacar guías fraudulentas declarando cargas semejantes pero de inferior valor, que si bien podían tener igual gravamen en el lugar de expedición no lo tenían en el lugar de destino. Este fue el caso, por ejemplo, del aguardiente de San Juan que so capa de cargas de vino era expedido a Córdoba y las provincias del Alto Perú.<sup>5314</sup> Según el abogado Juan José Castelli menos del quince por ciento de las cargas de aguardiente que entraban en Córdoba traían guía.<sup>5315</sup> También solían los comerciantes sacar sus guías de aduana entre los Tesoreros de la Real Hacienda de cada cabecera provincial para introducir sus mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la mercancía en puntos intermedios. Con lo que los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en el destino fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Finalmente, los comerciantes retornaban la guía al Tesorero, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.<sup>5316</sup>

#### **R-VI El contrabando o desdoblamiento del orden legal.**

En relación con el concepto que se tenía del comercio ilícito, Imbernón (1986) ensaya asimismo la innovadora concepción de que el contrabando formaba también parte de las prácticas de desdoblamiento del orden legal vigente en ese entonces, al contribuir a la legitimación histórica del orden colonial creando "...nuevos momentos de síntesis y redistribución económicos y sociales que formaron cadenas solidarias de intercambio en

oposición al aparato burocrático y al ciclo tributario y comercial realengo".<sup>5317</sup> Este desdoblamiento del orden legal llegó a ser extremadamente desigual, según se tratara de la política vigente antes o después de las Ordenanzas de Libre Comercio (1778).<sup>5318</sup> El instrumento central en este desdoblamiento del orden legal era la guía o licencia de internación expedida por las respectivas Aduanas. Cuando las autoridades aduanales capturaban un embarque fraudulento lo sacaban a pública almoneda (remate), entregando a los compradores las guías que los autorizaban a vender dichos artículos en el país. Los contrabandistas introducían luego géneros foráneos, por alguna ensenada poco controlada, para venderlos amparados en las guías que adquirieron en pública almoneda. Si bien por un lado la Corona otorgaba antes de 1778 permisos de registro con licencias o guías de internación que implicaban la autorización de extraer el equivalente de la mercadería importada en dinero-mercancía (plata doble), por el otro lado el Ministro Marqués de la Ensenada ordenaba ya en 1748 al Virrey del Perú Conde de Superunda que cesara la tolerancia para con el comercio a través de la Colonia del Sacramento. En cumplimiento de esta orden virreinal procedente de Lima, los Gobernadores de Buenos Aires interpretaban las guías de aduana restrictivamente con gran menoscabo del comercio, fijando plazos para que todos los factores y encomenderos autorizados para internar mercadería importada saliesen para sus destinos.<sup>5319</sup>

El menoscabo económico que estos plazos provocaban equivalía a algo más que un gravamen fiscal. Pero a partir de la aplicación de las Ordenanzas de Comercio Libre de 1778 la política fiscal colonial respecto de Buenos Aires se alteró radicalmente. Como la prohibición de extraer metálico del Alto Perú pasó de vedar la saca por vía de Buenos Aires a prohibir la extracción de dicho metálico por vía de Lima, el nivel de evasión fiscal en plata sin diezmar disminuyó notoriamente. Pero no lo fue así sin embargo el nivel de contrabando o ilegalidad practicado con respecto a las introducciones de mercadería extranjera. Por el artículo 30 del Reglamento del Comercio Libre se ordenaba que siempre que resultare comprobada la falsedad de las guías se castigara a los autores y cómplices de este delito con las penas previstas en el artículo 18, advirtiendo que aún cuando los géneros salieran como Españoles de los puertos habilitados en la Península e Islas de Mallorca y Canarias se reconocieran de nuevo en los de América y se declarara el comiso con extensión al buque que los hubiera transportado si perteneciese al mismo dueño de ellos. Por el mismo artículo prevenía S.M. que con ningún motivo ni pretexto se mezclaran, confundieran, ni suplantarán, los efectos y manufacturas de España con las extranjeras poniéndolas en unos mismos fardos, baúles o envoltorios, y que los que incurriesen en semejante delito sufrieran, irremisiblemente, las penas de confiscación de cuanto les perteneciera en los buques, y sus cargazones, la de cinco años de cárcel en un presidio de África, y la de quedar privado para siempre de hacer el comercio de Indias comunicando a los Ministros de las Aduanas que resultasen cómplices en esta contravención con el perdimiento de sus empleos.<sup>5320</sup>

La dificultad de perseguir estos ilícitos residía en las múltiples argucias y justificaciones con que los inculpatos eludían en los tribunales la aplicación de los castigos previstos por el Reglamento. En el caso planteado en 1785 a causa de una docena de medias imputadas de extranjeras, ante el Gobernador Intendente por Lorenzo García, consignatario de una memoria de efectos que condujo la polacra San Francisco de Paula, perteneciente a Don José Andrés Sanz, el vecino de Potosí que fuera su Capitán de Mita y socio en la quiebra del Administrador de la Aduana de Buenos Aires José Ximénez de Mesa, García alegaba que no bastaba el juicio de los expertos para declarar a las medias caídas en comiso, sino que se requería para confiscarlas no sólo verificar que

efectivamente fueren extranjeras sino también que hubieren sido presentadas con nombre de nacionales.<sup>5321</sup> A más del juicio de los expertos y la verificación de la extranjería, García requería que el valor aplicado al Juez y al denunciador debía ser sólo del de la docena de medias y no del de la memoria entera de los efectos encontrados en el cajón de marra.<sup>5322</sup> Asimismo, García sostenía que mal podía ser Sanz incriminado por cuanto al momento del registro y embarque de la memoria él estaba en Potosí, y por cuanto no hubo falsedad de marcas y despachos.<sup>5323</sup> Por el contrario, García aducía que si hubo en realidad suplantación de medias extranjeras en lugar de españolas, debía repetirse el valor de las mismas no contra Sanz sino contra la remitente en Cádiz, Doña María Pérez de Urria y Loye.<sup>5324</sup>

De acuerdo con el Reglamento del Comercio Libre los dueños de las mercaderías importadas o sus consignatarios debían limitarse a pagar el 3 o el 7% de los derechos de almojarifazgo, pudiendo vender libremente en Buenos Aires y Montevideo o en las provincias interiores sin oblar otra contribución, siempre y cuando ellos fueren en persona quienes introdujeran los géneros. Pero si los artículos deseaban ser destinados para el Perú o Chile debían satisfacer el derecho de internación en los puertos secos de Jujuy o Mendoza y la alcabala en el lugar donde efectuaran las ventas. Esta internación era aceptada siempre y cuando la mercadería importada llevara una tornaguía que indicara las aduanas de origen y de recepción, los nombres del vendedor y del comprador, y la naturaleza y precio de la mercancía, así como dejaran la correspondiente fianza en la Aduana de Buenos Aires.<sup>5325</sup> El quid de la cuestión que provocara litigios sin fin fue según Levene (1952) y Santamaría (1982) establecer donde debía saldarse la alcabala de primera venta. El Contador Mayor Francisco de Cabrera opinó que

"...si a los efectos que vienen de España consignados para las provincias interiores, no se les rebajase el 3% de la primera alcabala (que han de pagar forzosamente en esta Aduana al tiempo de desembarcarlos), del 4 o del 6% que han de contribuir en los parajes donde se expendan, se verificaría en tal caso, que se les exigiera de primera venta dos alcabalas, cosa abiertamente prohibida por las leyes y muy distante de las piadosas intenciones de S.M. en los nuevos establecimientos".<sup>5326</sup>

Nicolás Torrado repuso por su parte "...que deben pagar aquí el derecho de entrada y alcabala de primera venta, en cumplimiento del registro y el de la plaza a que los destinen aunque sea dirigiéndolos desde la misma Aduana".<sup>5327</sup> Finalmente, Francisco de Villanueva, creía conveniente el pago en Buenos Aires del 3% conforme a la Real Cédula de febrero de 1779 y al introducir los efectos en su destino "el exceso que falte al cumplimiento de la cuota que contribuyen los que se destinen desde esta plaza", agregando que

"...la alcabala de las plazas interiores nunca puede suprimir la de ésta, en razón de que hace dos representaciones cualquier factor o dueño de ropas de Europa que las envía a alguna otra plaza de la interioridad, para su cambio o permuta la una como factor ultramarino, la otra, la del primer comprador en la interioridad, que viene a comprar aquí los efectos de Europa".<sup>5328</sup>

Vistas las distintas opiniones vertidas, la Corona española resolvió que todo género europeo pagase en puerto el 3% de alcabala de primera venta, según los precios corrientes del país y con arreglo a la Real Orden de febrero; que para poder llevarlos al interior debía solicitarse guía, equivalente a la antigua licencia de internación para que, sobre el tanto por

ciento que da la Instrucción de Aduanas, se cobre el 4% en las provincias de frontera y el 6% en las interiores.<sup>5329</sup>

Para evitar los perjuicios que podría ocasionar a la Real Hacienda la generalización de convenios de segunda y tercera venta sin el pago de la correspondiente alcabala, la corona impuso un plazo máximo para producir la reventa, a partir del cual se cobraba nueva alcabala aunque la mercancía no se hubiera podido revender. Esta medida estaba fundada en la presunción de que habiendo pasado la mercancía a otro poseedor, y tomando éste el nombre y voz del primero, se consideren como de primera venta unos géneros que en realidad eran ya de segunda o tercera negociación y sujetos por consiguiente a nueva alcabala. El artículo 11 del capítulo I del Reglamento de Aduanas del 2 de Octubre de 1773 prevenía "...que aunque los mercaderes intenten sacar y remitir a otra parte cualesquiera géneros sin pagar la Alcabala adeudada pretendiendo no deberla hasta su efectiva venta, se les cobre este derecho luego que se cumpla plazo". Fue hasta 1795, que los efectos europeos o locales llevados a Potosí, tenían que pagar doble alcabala si por no haberse vendido, después de un año los primeros, o seis meses los segundos, se hubieran sacado de esa ciudad a otra plaza. El diputado consular de Potosí elevó en abril de 1795 una representación al Consulado porteño denunciando que

"...se halla hoy el comercio de Potosí con los numerosos obstáculos que impiden la libertad de sus negociaciones por el duplicado derecho a que se les compele luego que han verificado sus exportaciones fuera del año, así en el lugar de donde se extraen sus mercaderías como en el destino a donde las dirigen".<sup>5330</sup>

Agregaba el diputado consular que:

"...un negociante que interna sus facturas hasta estas provincias jamás podrá lograr todo su expendio en sólo el término de un año y cuando proyectase extraerlas para otros lugares inmediatos ya se encontrara sobre los costos de su transporte con otro derecho del que ya había satisfecho, por los mismos géneros, y que les hace subir considerablemente en sus precios".<sup>5331</sup>

Para impedir estos fraudes, la Corona implementó en 1796 el registro cerrado. La guía con el recuento de los bienes introducidos era remitida a Jujuy donde se permitía un nuevo registro si se los internaba al Alto Perú impidiéndole al comerciante vender legalmente sus mercancías en las plazas intermedias en el caso que el precio y otras condiciones lo hicieran estimulante. Habiendo resuelto y puesto en práctica la Real Aduana que

"...toda clase de guías que saquen los comerciantes para estas provincias vengan cerradas en clase de registro a entregar a la Tesorería menor de Jujuy resultan los inconvenientes que ya se han tocado:

1) que el negociante que dijo en esta capital que se dirigía a La Paz...y en la dilatada distancia de su carrera se desengañó y tomara el arbitrio de hacer sus ventas en la plaza que le convenga...la guía que se halla en La Paz impide esta libertad;

2) que el Tesorero de Jujuy ha tenido allí muchas guías y varios interesados se han encontrado aquí (en Potosí) sin ellas y los perjuicios se dejan muy bien entender".<sup>5332</sup>

El pedido surtió efecto y el Tribunal del Consulado accedió poco después a derogar el registro cerrado y permitir las ventas en los mercados de tránsito.

El costo de la guía y demás trámites aduanales estaban en función de la escala de las operaciones comerciales practicadas. A mayor intensidad del comercio más bajos eran los aranceles fijados para cada trámite burocrático. Es así que en las provincias interiores resultaba más costoso comerciar que hacerlo en la propia sub-metrópoli colonial. Juan Antonio Moldes a nombre de los comerciantes de Jujuy hizo presente en 1794 el perjuicio

"...que experimentan por la cobranza que se les hace en estas Reales Cajas de diez reales de cada guía que sacan a saber seis reales que se aplican para el escribano de Real Hacienda, y los cuatro reales que tocan al Rey con más cuatro reales de la cancelación que se les hace de su fianza cuando traen tornaguía no debiendo cobrarse más de dos reales y eso cuando no se paga de contado la Alcabala para extender la fianza".<sup>5333</sup>

En 1794 hallándose el comercio en estado tan deplorable y decadente se hacía sensible que se lo gravara con semejante pensión, máxime cuando era notorio que en la Aduana de Buenos Aires sólo satisfacían por una guía que sacaban en papel común (sin sellar) cuatro reales pertenecientes a la Corona, y por extender la fianza los dos reales.

La defraudación fiscal practicada por todos aquellos comerciantes venidos de España con el Reglamento del Comercio Libre, se manifestaba también en la evasión del pago de la alcabala del 6% que se lograba instalando almacenes que pretendían el privilegio del comercio mayorista pagando sólo el 3% de alcabala para luego vender al menudeo. Por ejemplo, en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII, Francisco Ximénez de Mesa, el conocido y fraudulento Administrador de la Aduana porteña, nos manifiesta la existencia de almaceneros tenderos que vendiendo al por menor lo que han traído por su cuenta de España, quieren les valga la calidad de almaceneros y no la de tenderos.<sup>5334</sup> En los puertos de entrada, a diferencia de las provincias interiores, la comercialización de los productos importados denominados efectos de Castilla merecía toda suerte de maquinaciones con tal de eludir los gravámenes fiscales, establecidos con el fin de controlar el contrabando. Esta confusión de funciones derivó en una "...controversia de opuestos intereses, que trae perturbación, e irá en mayor incremento si la autoridad no lo fija", pues los almaceneros que vendían al por menor no pagaban la alcabala debida, mientras que los tenderos cargaban con el peso del gravamen.<sup>5335</sup> Para dificultar el contrabando, la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos. Los propios agentes mayoristas del monopolio gaditano en Buenos Aires se esforzaban para que sus habilitados en el comercio minorista no se mezclaran en tratos ilícitos.<sup>5336</sup> La lealtad personal para con el patrón del comercio y la fidelidad en el cumplimiento de los contratos estaban entre los pre-requisitos ineludibles para el ascenso social dentro de las filas de la burguesía comercial descrita por Sombart (1972), en su biografía o contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. En la demanda que Juan Antonio de Lezica y Osamiz le iniciara a su primo Juan de Osamiz y Urtubey, prevalecen las pautas morales de las que habla Sombart (1972) y que se encuentran tipificadas indirectamente en el desprecio que se cultivaba por las pulperías. Lezica le había adelantado a su primo Osamiz seis remesas por valor de \$98.820 entre 1776 y 1783. Pero dicho Osamiz

"...ingrato y desconocido, leños de corresponder a tantas finezas, y de dar cumplimiento a sus obligaciones, no sólo no ha procurado remitir los caudales correspondientes para pagar a su benefactor, pero leños de ello tengo (Lezica) puntuales y expresas noticias de que su conducta es despreciable, y que en lugar de aplicarse a sus negocios dedica el tiempo a sus devaneos, y disipa los bienes de modo que causa escándalo y a mí me produce un perjuicio inmenso".<sup>5337</sup>

Finalmente, Osamiz terminó como no podía ser de otra manera, sirviendo los intereses del fallido Administrador de la Aduana de Buenos Aires Don Francisco Ximénez de Mesa. En las curiosas instrucciones acerca del comportamiento que debe llevar en Potosí el joven José del Pozo, Ximénez de Mesa le advierte en 1786 que "...en todo no des paso sin Osamiz, bajo cuya cubierta va esta y otra de pasatiempo".<sup>5338</sup>

El cumplimiento estricto de las obligaciones, la seguridad del crédito, y el evitar devaneos, escándalos y disipación de bienes estaban para Juan Antonio de Lezica en el decálogo de una conducta respetable.<sup>5339</sup> La estigmatización del despilfarro y la ociosidad como fuentes de deshonor, infamia, y lascivia, señalada oportunamente por Sombart (1972), encuentran en las palabras de Lezica su confirmación. El parentesco sólo, no era entonces garantía alguna contra la corrupción, ni tampoco garantía de cumplimiento y lealtad en las operaciones mercantiles, cuando la distancia no permitía ejercer un control periódico y directo, y las tentaciones de Potosí para malgastar los dineros, eran muchas. Para evitar los fraudes entre los comerciantes mismos o entre los comerciantes y el público consumidor era preciso asegurar la lealtad comercial. La lealtad comercial comprendía el respeto por las formalidades comerciales. La formalidad comercial incluía a su vez el uso de pesas y varas arregladas al patrón establecido por el ayuntamiento, y el uso del sello respectivo. Era responsabilidad de los Fieles Ejecutores vigilar estrictamente, visitando periódicamente las tiendas y pulperías, el uso de las pesas y medidas legales. En un sonado caso ocurrido en Salta, Don Mateo de Saravia y Jáuregui, Abogado de la Real Audiencia y Fiel Ejecutor Propietario de la ciudad de Salta, encontró en una Visita practicada en 1792 que Domingo Cardo, factor del comerciante salteño Manuel Antonio Boedo, usaba en su tienda pesas y varas sin el sello correspondiente.<sup>5340</sup> En otra Visita posterior, como aún continuaba con las pesas y varas sin sellar, se le recogen las mismas y se le manda "...que interín no ocurra con varas y pesas arregladas, para que se le sellen, tenga su tienda cerrada".<sup>5341</sup> De haber estado las pesas y vara de Boedo arregladas con el Padrón, Saravia no hubiera tenido necesidad de recogerlas y en el acto mismo de la Visita se las hubiera sellado. Pero lo cierto era que el marco de las pesas de Boedo estaba menguado, y aunque Boedo alegaba que era inservible y no era usado, el hecho fue que en la Visita Boedo presentó las pesas como corrientes y actuales. Como consecuencia de ello Saravia impuso a Boedo una fuerte multa, a la que este último se resistió altivamente. Pero amén de las regulaciones de toda índole, los comerciantes minoristas corrían con otro tipo de riesgos. El mercado minorista

"...era muy trabajoso y arriesgado por las faltas de vara, por la retacería que queda, por el desperdicio en muestras, por el deterioro y ajamiento del genero en tantas manos como corre para ser visto, examinado y comprado, en que se emplea mucho tiempo, y se difiere la venta con estimación".<sup>5342</sup>

La evasión fiscal también tenía sus costos, que incluían los gastos de residencia. Estos últimos se inflaban debido a las sucesivas mudanzas de residencia que era preciso

practicar para impedir su ubicación por parte de los recaudadores alcabaleros, lo que explica a su vez el porqué preferían los comerciantes alquilar que comprar su vivienda. También era muy común que, no obstante que la ley obligaba a llevar cuenta y razón particular de lo que compraban y vendían en sus libros manuales y mayores, pocos comerciantes observaban en Buenos Aires lo prescripto por las leyes reales. Entre los costos más altos del comercio ilícito figuraban los ingentes gastos en gratificaciones y sobornos.<sup>5343</sup> Sin duda, el costo más alto de todos consistía en el riesgo de cárcel. Si bien la cárcel no estuvo muy generalizada, dada la abierta complicidad de los funcionarios reales con el contrabando, se dieron casos donde los conductores de los contrabandos se vieron forzados a usar de métodos violentos. En sus curiosas y poco conocidas memorias el comerciante Miguel de Learte recuerda que cuando pasó a Buenos Aires desde Córdoba para invertir su corto caudal en los contrabandos de la colonia, se ocupó de ese "penoso ejercicio" unos meses

"...sin tropiezo, hasta que una vez, unidos tres, para conducir un crecido contrabando de un registrante, tuvimos encuentro con los Guardas, y no pudiendo componerlos con las ofertas de dinero, fue preciso darles pasaportes de plomada, la que recibieron tres o cuatro y estos y otros no quisieron más despachos, retirándose sin ellos y con bastante prisa".<sup>5344</sup>

Reconoce Learte en los recuerdos de sus aventuras, que dicho lance les hubiera costado caro si el interesado en la remesa ilegal no hubiera sido un individuo "de tanto respeto" (por lo visto el Registrante), y si los heridos en lugar de haber sido peones, como en realidad lo fueron, hubieran sido Guardas.<sup>5345</sup>

Aquellos otros pocos contrabandistas que no encontraban modo alguno de escapar a la persecución fueron necesariamente procesados. En 1760 el comerciante y hacendado Francisco Álvarez Campana reportó que él había sido informado que Miguel Ibáñez, capataz de la estancia que tenía en las Islas del Paraná, había vendido contra sus órdenes "...varias porciones de carne, tasajo, y sebo a los barcos Portugueses que arribaron a ese lugar". Como ese hecho, además del perjuicio económico que le podía causar, "...podía dar motivo a la malicia y la emulación de pensar algo menos favorable a su comportamiento" Campana pidió a varios de sus jornaleros que testimoniaran.<sup>5346</sup> En otro caso, ocurrido en 1772, Don Roque Verón, el Comandante Militar del Río Pardo, en la Banda Oriental, fué acusado de vender caballos a los Portugueses.<sup>5347</sup> Aquellos que fueron encarcelados por cargos de contrabando, solían obtener fácilmente fianzas de cárcel, entre las cuales hemos hallado la otorgada a favor de Juan Diego Gauto, Manuel Fontán, Bernardo Barela, Diego Collado, y Antonio Ximénez.<sup>5348</sup> Otro de los favorecidos por las fianzas de cárcel fue Manuel Cipriano de Melo, quien había sido apresado in fraganti en varias oportunidades por introducir cargamento de contrabando.<sup>5349</sup> Durante la última de sus varias prisiones Melo, quien pese a sus antecedentes "delictivos" era un espíritu sensible, amigo de Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres, dejó para la literatura rioplatense un rastro imborrable, hasta hoy inédito, al componer unas décimas en forma de contrapunto o payada consigo mismo, que revelan lo extendido que estaban en ese entonces las prácticas corruptas y los delitos contra el fisco real:

## **R-VII La discriminación de los comerciantes entre sí.**

Posteriormente, con la autorización real concedida a los comerciantes de Buenos Aires de comerciar con colonias extranjeras y en buques neutrales (1791-93) se alteró nuevamente el ritmo de la evasión fiscal entrándose a discriminar a los comerciantes entre sí. Con motivo de los debates acerca de si los cueros eran o no "frutos del país" susceptibles de ser exportados y de la imposición de los derechos de nueva avería para el armado de una escuadrilla defensiva en el Río de la Plata que protegiera además la rada contra los ingentes contrabandos, se dio a fines del siglo XVIII, durante las Guerras Napoleónicas, la evidencia más significativa del creciente conflicto entre dos grupos distintos de intereses.<sup>5350</sup> Aquellos que exportando cueros introdujeran esclavos procedentes del África estaban exentos del pago de la alcabala del buque adquirido y de los derechos del cargamento extraído. Más luego, cuando en oportunidad de las guerras napoleónicas, la corona impuso en 1801 el derecho de avería (4% por tonelada) afectó fundamentalmente a aquel grupo de comerciantes negreros que tenían barcos propios, fletaban cueros a Europa, y corrían con el alto costo del riesgo de mar.

Por el contrario, el grupo de comerciantes terrestres, que así se llamaban los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, que traficaba con plata, oro y géneros Europeos votó la contribución del Derecho de Avería en el Consulado, echando todo el peso de la contribución sobre los comerciantes que poseían naves y traficaban con cueros y esclavos.<sup>5351</sup> Finalmente, cuando en oportunidad de una causa criminal por detracción de ganados, la parte demandante intentó elevar a la Justicia ordinaria los casos relacionados con los debates entablados en el Tribunal del Consulado, para que dirimiera su competencia jurisdiccional.<sup>5352</sup> Reaído en el juzgado de Francisco Antonio de Escalada la responsabilidad de dirimir el entuerto, éste último, miembro de una familia con fuertes intereses minero-exportadores y profundamente imbuido de una ideología mercantilista, declaró que el que mande Su Majestad que el cuerpo del Consulado se componga de Hacendados y Comerciantes

"...no es darle la menor jurisdicción sobre aquellos, ni sobre los tratos que tengan acerca de la venta de los frutos de sus haciendas, si no únicamente poner a su cuidado el adelantamiento y fomento de la agricultura, como la madre de donde sale lo que se trafica y comercia; así como no deberá conocer de las sobras de los artesanos, cuyo adelantamiento y perfección también parece que es de la inspección de ese cuerpo".<sup>5353</sup>

Al prevenirse en la Real Orden del 31 de enero de 1797 que todos los años se distribuyan premios entre los que mejor se adelantasen en las artes, Escalada también concluye que dicha prevención "...no puede tener por objeto, sino el del florecimiento de las artes, o su adelantamiento, que es el mismo que se procura para la agricultura por igual medio".<sup>5354</sup> En su oficio el representante del Consulado, imbuido de un pensamiento más proclive al librecambismo emergente en la época insiste que "...combinando ideas no halla en el hacendado otra investidura que darle que la de un comerciante, pues sus labores y beneficios industriosos se dirigen a mantener un comercio de los frutos".<sup>5355</sup> Al replicar, Escalada reflexiona que

"...si el Tribunal del Consulado toma el comercio con tanta amplitud, quanta la combinación de ideas que manifiesta su oficio, pudieran extinguirse los mas de los Tribunales, como sin materia de que conocer. Por que si con motivo de mantener los hacendados un comercio de frutos, se han de llamar comerciantes; por la misma razón se deberían llamar tales los fabricantes de paños, lienzo, medias, zapatos,

vestidos, que todos hacen un comercio de sus manufacturas; y se deberán llamar igualmente tales los labradores que traen a vender a la plaza huevos, gallinas, granos, menestras, y aún hortalizas; porque todo esto y algo más es fruto de sus haciendas, y en parte también de su industria, como el queso, la mantequilla, el charque, que todo se vende, o lo que equivale a lo mismo en concepto de V.S., se comercia con ello".<sup>5356</sup>

Es evidente que este litigio plantea una nueva realidad económica para cuyo análisis Escalada contaba sólo con el pensamiento mercantilista vigente. El hecho de que en dichos años de guerra "...los hacendados contribuyen o constituyen, uno de los mejores ramos del Comercio" no debería, a juicio de Escalada, cambiar su identidad estamental. De ocurrir ello, también deberían someterse a la competencia del Tribunal del Consulado los fabricantes y labradores "...por ser todos ramos considerables de Comercio". Hablando en general, sostiene Escalada "nunca lo más o lo menos hacen mudar de especie la cosa, por el principio de la Filosofía o de la sana razón: que lo más o lo menos no muda especie".<sup>5357</sup> Por último, de llamarse comerciantes "...los que venden frutos de sus haciendas o las obras de sus manos, fabricantes y artesanos, sólo por la razón dada de vender o cambiar sus frutos y manufacturas" Escalada arguye socarronamente que también lo serían y estarían inmediatamente sujetos a la jurisdicción de ese Tribunal "los eclesiásticos y religiosos, y aún los mismos Cenobitas o Anacoretas, que se sabe vivían en parte del trabajo de sus manos".<sup>5358</sup> Esta resistencia a considerar como comerciales las actividades productivas llevó a Escalada a sostener una rígida división del trabajo:

"...Una cosa es cultivar la tierra, y dedicarse a la cría de ganados, para sustentar sus familias, y si algo sobrase, venderlo; y otra muy distinta el dedicarse a estos u otros ejercicios, sólo con el fin de venderlo todo, y de transportarlo a regiones distantisima, si de esto resulta mayor ganancia. Lo primero lo hacen los que puramente son labradores, o hacendados; pero lo segundo sólo los mercaderes o comerciantes, entendiéndose si estos vuelven a emplear el producto de los frutos que transportan en efectos que retornan al país de donde salieron; que es lo que hacen los verdaderos mercaderes, lo que los caracteriza de comerciantes, y lo que constituye el giro o torno de especies, de donde nace y procede el ingreso de la Real Hacienda, por la reduplicación de ventas, exportación e introducción de efectos".<sup>5359</sup>

También serán mercaderes, sin salir de este género, a criterio de Escalada,

"...los que los comprasen al labrador y artesano para revender; por que estos ya lo hacen por negociación y para lucrar, y como que ellos no han cultivado las especies que venden, ni las han fabricado con sus manos, no se pueden llamar labradores, artífices, ni artesanos, y de consiguiente es indispensable que los coloquemos en la clase de mercaderes o comerciantes".<sup>5360</sup>

Finalmente, cuando más perjudicada se vio la recaudación fiscal fue, como es obvio, cuando el grupo librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido esto durante las Invasiones Inglesas. En todo el año 1808 no fue posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente aumentada por disposición de las autoridades, y la Junta se vio obligada a disponer de los fondos que entraron en la primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo sobre la alcabala de 1807, ya tan demorada.<sup>5361</sup> A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el detalle

de lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias practicadas al intento", ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que pasaran las boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con todos los recursos legales.

Estos primeros síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en años posteriores, a pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el gobierno. A todos estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros de Alcabala de 1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las operaciones recaudatorias de ese año.<sup>5362</sup>

## **Epílogo Sección II-G**

Las crisis mercantiles y agrarias desataron a su vez una profunda crisis administrativa en el orden burocrático. De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus autores fueron en la mayor parte de los casos criollos.<sup>5363</sup> Esto revela que los casos de corrupción que constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX latinoamericano.

Es evidente que este conflicto no resuelto socavó la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecombio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

Finalmente, cuando más perjudicada se vio la recaudación fiscal fue, como es obvio, cuando el grupo librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido esto durante las Invasiones Inglesas (1806-07). En todo el año 1808 no fue posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente aumentada por disposición de las autoridades, y la Junta se vio obligada a disponer de los fondos que entraron en la primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo sobre la alcabala de 1807, ya tan demorada.<sup>5364</sup> A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el detalle de lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias

practicadas al intento", ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que pasaran las boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con todos los recursos legales.

Estos síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en años posteriores, a pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el gobierno. A todos estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros de Alcabala de 1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las operaciones recaudatorias de ese año.<sup>5365</sup>

## **Sección II-H      Rebeliones de originarios, crisis militar,      y cuestionamiento del orden corporativo**

Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez, 1961; y McAlister, 1963), influidos por la lectura de Weber, la burocracia colonial española, durante la hegemonía Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación carismática, estamental y patrimonial sino un sistema o balanza de equilibrio entre instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de rituales y fueros o jurisdicciones especiales.<sup>5366</sup> Como el status de los individuos, regidos por criterios de nacimiento, que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961), con el status mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación potencialmente crítica.<sup>5367</sup>

En ese sentido, nos hemos propuesto analizar el caso de la corporación militar, y su inestable equilibrio vis a vis las restantes corporaciones del estado colonial. Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal, estamental, señorial, mercantilista y patrimonial, propias de un régimen absolutista que llegaba a su fin, en esta nueva sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas del orden corporativo en el seno de la milicia, en dos sucesivos capítulos: las contradicciones entre el fuero militar y un poder político subordinado y las rivalidades entre los Comandantes de Armas y la burocracia subordinada.

### **Capítulo II-H-22      Contradicciones entre el fuero militar y el poder político .**

- S-I.    Fuero militar como institución de impunidad.
- S-II.    Usufructo del fuero militar.
- S-III.    Grado de generalización del fuero militar.
- S-IV.    Extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.
- S-V.    Composición étnica de oficialidad y tropa.
- S-VI.    Rigidez de los códigos disciplinarios existentes.

## **S-I El fuero militar como institución de impunidad.**

El otorgamiento del fuero militar operaba en forma semejante a la avocación, inhibitoria,<sup>5368</sup> o declinatoria,<sup>5369</sup> pues substraía al beneficiado de la jurisdicción ordinaria o civil. El fuero militar era en 1794, a juicio del Dr. Jorge del Pozo y Delgadillo,

"...una gracia y excepción especial, y por ella se dislocan los miembros de la Sociedad de la Jurisdicción Ordinaria que es la fuente y basa principal; a cuio favor se deben interpretar aún los casos dudosos, siempre que el fuero privilegiado como odioso y restrictivo no tenga muy en claro los puntos que deben extraerlo del Orden Común".<sup>5370</sup>

Sin embargo, en aquellas regiones apartadas del núcleo colonial y próximas a la frontera se jerarquizaba la jurisdicción militar por sobre la capitular.<sup>5371</sup> No obstante ello, en el caso de las Gobernaciones Militares, los autores difieren acerca de cuál jurisdicción era la principal y cuál la supletoria. Mientras Ferrés (1944) sostenía que la jurisdicción de los Alcaldes era la principal, y la de los Gobernadores supletoria, Petit Muñoz (1947) sostenía la tesis contraria.<sup>5372</sup> En Córdoba, sus cabildantes argumentaban en 1753 que, al igual que en Buenos Aires, los Tenientes de Rey deberían ejercer sus funciones sólo en la jurisdicción militar y "...en raro caso, la [jurisdicción] ordinaria [o civil]".<sup>5373</sup> En Potosí, en 1771, el Procurador del Cabildo Raymundo Yturriaga y su compañero de vara José de Vargas solicitaron enjuiciar al Gobernador Interino Manuel Martínez de Escobar y Coronado,<sup>5374</sup> negando que en su persona "...hubiese jurisdicción alguna militar...repetiendo no sólo por escrito, sino de palabra en el Cabildo, que no me conocía por Cabo ni Gefé, y solamente [reconocía] al Coronel Don Nicolás Salado".<sup>5375</sup> En Charcas, en 1780, en la causa criminal contra el Capitán de Milicias Juan Bautista Buytrago por pretender le valiese el Fuero Militar resolvió el Rey por Real Cédula del 22 de Junio de 1780 que la Real Audiencia de Charcas conociera la totalidad de la causa.<sup>5376</sup> En forma similar, dictaminó en 1794 en el caso de la Testamentaria del finado Capitán de Ejército honorario José de Andrés Sanz.<sup>5377</sup> Y en 1795, con motivo de la interposición de declinatoria por existencia del fuero militar invocada por el Teniente Coronel Francisco Basagoitia, dueño del Ingenio del Rosario, contra el Subdelegado y Alcalde Mayor de Minas de Aullagas Luis Sánchez Robledo, el Fiscal Vitorián de Villava sostenía, siguiendo los precedentes jurisprudenciales, que desde los casos Buytrago y Sanz vivían los Tribunales de Justicia solo

"...de su jurisdicción, y por esa regla ha decidido la Real Audiencia varias competencias porque hacer de otro modo sucedería que el fuero de guerra dejase sin súbditos a los demás jueces por quanto en América los mas son honorarios de Ejército, o Milicianos sin cuerpo, sin sueldo y sin ejercicio".<sup>5378</sup>

La declinatoria por existencia del fuero militar invocada por el Teniente Coronel Basagoitia, se fundaba en que los Subdelegados de Real Hacienda no tienen jurisdicción sobre los Militares. En ese sentido, el Juez Real Subdelegado del Partido de Chayanta Dr. Pedro Francisco de Arismendi adujo que los Subdelegados "...deben y pueden conocer en causa de los Militares", citando a su vez para ello el dictámen del Fiscal Villava, quien sostuvo en ese mismo caso que "...si no tuviesen los Subdelegados jurisdicción sobre los Militares, no se les encomendaría de ninguna manera las cuatro causas en que debe juzgar en sus Partidos, y entre ellas las de Guerra, que es decir conocer en causas de los Militares".<sup>5379</sup> Y conocer no solo en las causas de soldados, sino también en las de los oficiales, "...pues de lo contrario era ampliar a los Militares que no están a la frente de sus

cuerpos, a que maten, roben y hagan lo que se les antoge con los pobres provincianos por el fuero militar, y por que el recurso está distante".<sup>5380</sup>

En Asunción del Paraguay, en 1787, al igual que en todas aquellas jurisdicciones donde por carecer de posibles nadie adquiriría venalmente los grados militares, el Teniente Asesor Letrado Dr. Mariano Lorenzo Grambel y los Alcaldes Ordinarios, se veían en "duplicadas confusiones" por la extremada generalización que había adquirido el fuero militar y "...la continúa competencia que les forman los Oficiales Milicianos", alegando que no sólo gozan sus soldados del fuero militar, entendiendo por éste a los hoy denominados fueros personales, "...sino también sus mujeres, hijos y criados asalariados".<sup>5381</sup> En otras palabras, los Alcaldes Ordinarios "...no tienen persona en quien ejercer su jurisdicción ordinaria", de lo que se deduce que su elección "...es inoficiosa e inútil, y su verificación indecorosa a los que la ejercen, pues no se hallan personas sugetas a su fuero".<sup>5382</sup> Como a estos milicianos provinciales se les declaró el goce del fuero militar,

"...resulta hallarse la Ciudad en la confusión de no tener personas libres de este fuero, a quienes ocupar en los cargos y empleos indispensables de República, y lo más notable, los Alcaldes Ordinarios, quasi sin uso de su jurisdicción, por ser todos exemptos".<sup>5383</sup>

A más de los Jefes, Oficiales y Soldados de los tres Regimientos de Caballería de Campaña,<sup>5384</sup> comandados por José Antonio Yegros,<sup>5385</sup> Salvador Cabañas y Ampuero,<sup>5386</sup> y José Espínola y Peña,<sup>5387</sup> y las Compañías de las Villas de Curuguatí, Rica, Concepción, Remolinos y Neembucú, también estaban exentos del cumplimiento del servicio "de república" los sujetos empleados en las Reales Rentas de Tabaco, Administración de Correos, Curia Eclesiástica, Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y Tribunal de la Santa Cruzada.<sup>5388</sup> Y en Montevideo, en el conflicto de poderes militares suscitado en 1800 entre el Subinspector General Rafael de Sobremonte, más luego Virrey y Marqués, y el Gobernador Militar de Montevideo José de Bustamante y Guerra, el entonces Virrey Gabriel de Avilés dictaminó que "...deberá hacerse diferencia de la [jurisdicción] civil a la militar, porque aquella [la civil] la ejercería en calidad de Corregidor o Gobernador Político, y esta [la militar] por lo común no se extiende sino a la Plaza, y sus fuertes y castillos".<sup>5389</sup>

También La Rioja --que contaba con 24 compañías de caballería con un total de 1800 hombres, y por apartada del tráfico comercial con el Alto Perú carecía de oficiales de beneficio-- se caracterizó por la frecuencia de conflictos político-militares y por una extremada generalización del fuero militar.<sup>5390</sup> Estos conflictos se habían desatado en la última década del siglo XVIII, cuando ocurrió la lucha entre las Casas de los Dávila y los Ocampo. El Comandante General de Armas y Subdelegado de Real Hacienda de La Rioja Vicente Antonio Bustos,<sup>5391</sup> cuñado del Receptor de Alcabalas José Pascual de San Román y Castro,<sup>5392</sup> ligado a los intereses mineros de Chilecito, quien con seguridad ejercía el ilegal reparto de mercancías, se hallaba enfrentado a las autoridades capitulares, en especial al Alcalde de Hermandad Francisco Antonio Ortiz de Ocampo,<sup>5393</sup> vinculado a los intereses agrarios de Los Llanos y perteneciente a un antiguo linaje descendiente de los encomenderos del siglo XVII. Este enfrentamiento obedecía a que los Comandantes de Armas, a diferencia de los Alcaldes Provinciales y los Alcaldes de Hermandad, no dependían de los Cabildos sino de los Gobernadores o Gobernadores-Intendentes, quienes a su vez no debían ser naturales ni vecinos de la población donde hubieren de ejercer su

función.<sup>5394</sup> El peninsular Bustos se había tomado la facultad, sin consultar con el Cabildo, de revestir a Don Nicolás Bazán,<sup>5395</sup> con el título de Capitán de Milicias "...para que a la sombra de este aparente fuero [militar] tuviese un motivo para negarse a la obediencia y reconocimiento de la jurisdicción de Ocampo".<sup>5396</sup> Bazán era un individuo a quien Ocampo tenía procesado

"...por la fuerza y violencia que quiso hacer a una mujer casada, por su vida sensual y distraída sin ocupación alguna seria, entregado enteramente a la licenciosidad sin oficio ni beneficio".<sup>5397</sup>

Es este sujeto, a quien Ocampo procuraba arrestar, al que Bustos otorga en 1799 el fuero militar. Pero como a los títulos y grados militares y eclesiásticos, para que tuvieran vigencia, era preciso publicarlos y confirmarlos, se lo comisionó al propio Bazán para que publicase su nuevo título, con el resultado previsto de que Ocampo "...estorbó su publicación asiendo que se retirase toda la jente protestando".<sup>5398</sup> Bazán reportó esta novedad manifestándole asimismo a Bustos, con todo el rencor de un hombre herido en su vanidad, que

"...no se le esconden las operaciones de este Hombre y su hermano el Maestro Don José Nicolás Ocampo el orgullo y la discordia con que estos tienen perturbado todo el Balle ni menos las continuas e inoficiosas ocupaciones con que obstigan a las Milicias asiéndose Sres. dellas sin mas fin que el que les rindan Basallaje para sujetar a todos a su propia servidumbre y aser maior ostentación de sus personas".<sup>5399</sup>

El hostigamiento a las Milicias por parte de Ortiz de Ocampo, que Bazán denunciaba,

"...sólo tienen a Vmd. enseñado los Contínuos Clamores, tanto de los soldados quanto de los demás oficiales Milicianos que mirándose yndefensos para competir con estos sujetos tienen por menos mal seder en ellos sus acciones por no tener disensiones, y de aquí nace el total desarreglo de estas Companías, y desquaderno de soldados que tienen por vien andar dispersos y avandonando sus Casas a fin de livertarse de las injustas tareas con que se les apensionan".<sup>5400</sup>

Habiéndose resistido Ocampo a la Comisión, Bustos dió parte a la Gobernación-Intendencia de Córdoba, de modo tal que su Teniente Letrado le ordenó a Bustos intimase a Ocampo a que "...en el preciso término de 30 días compareciese en aquel Gobierno".<sup>5401</sup> La medida adoptada, equivalente también a una avocación, contravenía según el Dr. Mariano Zavaleta, las disposiciones "...que prohíben sacar los vecinos de su domicilio, desarraigarlos, y obligarlos para sus comparendos a otras distancias,...sobrellevando el sonrojo de padecer la suspensión de la vara de Alcalde".<sup>5402</sup>

## **S-II El usufructo del fuero militar.**

Las Leyes de Indias no concedían el usufructo del fuero militar "...sino a los que gozan sueldo y forman cuartel o a los que por nuevas de enemigos se hallan en campaña y servicio actual".<sup>5403</sup> Pero con la aplicación indiscriminada del fuero militar, sin respetar las restricciones impuestas por las Leyes de Indias se originaba una crónica indisciplina militar, nacida del desmedido goce de este privilegio y de la inescrupulosa ambición de las Milicias Urbanas y Rurales --compuestas mayoritariamente por mestizos-- en querer

monopolizar todos los premios militares. En Salta, siendo Gobernador Interino en 1775 Francisco Gavino Arias, los Coroneles de Milicias Juan Blanco Cruz y Lorenzo Gordaliza tuvieron

"...la osadía de representarle por escrito que, como Gobernador de la Provincia, ni por otra razón, no podía entender en las causas fuesen civiles o criminales pertenecientes a los Milicianos que componían los dos Regimientos, sino que privativamente les correspondían a ellos como Coroneles, y en grado de apelación al Consejo de Guerra".<sup>5404</sup>

Treinta años después, en 1796, en Córdoba, Juan Bautista de Isasi,<sup>5405</sup> declaraba que los numerosos miembros de las castas (mulatos y zambos libres), en quienes recaían los empleos militares,<sup>5406</sup> también aspiraban al fuero militar, "...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e insolentarse".<sup>5407</sup> En Buenos Aires, en 1797, los oficiales de Milicias de Pardos y Morenos tenían libertad de nombrar por sus defensores a oficiales de las mismas Milicias excepto los de sus Compañías, o a los oficiales Veteranos existentes en el paraje donde fueren procesados.<sup>5408</sup> Pero dos años después, en 1799, para evitar compromisos con los Pardos que se presentaban a los Jueces aduciendo ser oficiales de Milicias y en consideración de los perjuicios e inconvenientes

"...que pudiera acarrear una exclusiva y separación de tantos individuos de la jurisdicción ordinaria, además de la experimentada con el moderno establecimiento del Consulado [de Comercio]",<sup>5409</sup>

el Alcalde de primer voto Francisco Antonio de Escalada,<sup>5410</sup> en oficio al Virrey, solicitaba que a vista de las Reales Ordenanzas de 8 de noviembre y 30 de diciembre de 1794, que extendían el fuero militar a las Milicias Provinciales de Españoles, no se incluyan ni reputen a las Milicias de Naturales, Pardos y Morenos "...por parte del Ejército".<sup>5411</sup> Y en Salta, en oportunidad de las Invasiones Inglesas, el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo,<sup>5412</sup> que era peninsular, denunciaba que en aquellos tiempos se solicitaba ser miliciano, sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar "...y no para servir en la Guerra del Chaco, ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años pasados en las Provincias Peruanas".<sup>5413</sup> Al acogerse al fuero militar y mediante la cesión de sus correspondientes sueldos a los oficiales principales, los labradores y los aprendices y maestros artesanos se liberaban de las imputaciones y las persecuciones de los Alguaciles y Fieles Ejecutores.

### **S-III El grado de generalización del fuero militar.**

La incidencia que tuvieron los conflictos entre la Milicia y el poder político variaba con el grado de generalización que alcanzaba dicho fuero militar. En Buenos Aires, Clara Echenique, viuda del Coronel de Milicias José Martínez y González, solicitaba en 1785 al Alcalde Juan Antonio de Lezica, que libertara a una criada suya llamada Francisca, por entender le correspondía también a ella el fuero militar.<sup>5414</sup> En Mendoza, localidad donde existían veintiún compañías de milicias, en una población total en su ciudad y distrito de 10.098 habitantes,<sup>5415</sup> al exceptuarse del servicio 194 personas, el Virrey previno al cabildo en 1779 que la Real Orden por la cual se otorgaba el fuero militar a los Oficiales, Sargentos y Cabos de dichas compañías, provocaría daños irremediables a la justicia, pues Mendoza "...al parecer no admite este número de esentos, sin aniquilar aquella misma jurisdicción [común, ordinaria o civil] en el todo, o hacerla quasi imaginaria".<sup>5416</sup> Si aquel

número de personas tenía exención de la jurisdicción ordinaria o civil, los jueces o alcaldes vendrían a quedar "...reducidos a tener sólo el nombre de tales en el Pueblo, y padecer el sonrojo de ser declinado cada momento".<sup>5417</sup> No obstante esta generalización del fuero militar, la Real Orden había sido entendida con las limitaciones de las Ordenanzas del Ejército para los casos y causas civiles y criminales. Asimismo, en 1799, por otra Real Orden, el fuero militar otorgado a los militares que tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en el ejercicio del oficio político cesaba automáticamente.<sup>5418</sup>

En cuanto a su extensión en el tiempo, el Virrey sostenía en 1779 que el fuero militar no era eterno o personal, pues debía entenderse que duraba sólo mientras que los beneficiarios "...estuviesen alistados o empleados en los respectivos cuerpos".<sup>5419</sup> También el Teniente Gobernador Coronel Francisco Xavier de Viana, contestando un reclamo sobre el fuero militar dictaminó en 1813 que las tropas de milicia "...no gozan del fuero militar sino precisamente en solo el tiempo en actual servicio".<sup>5420</sup>

#### **S-IV La extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.**

La extensión del privilegio de exención del servicio de milicia a los cosecheros matriculados en la Renta del Tabaco acentuaba la anarquía. Este fué el caso de las Milicias Provinciales del Paraguay donde la situación de revista adquirió un ritmo caótico. En febrero de 1804, luego del fracaso de la Milicia Paraguaya en la llamada Guerra de las Naranjas,<sup>5421</sup> esta situación había empeorado notoriamente. Según carta del Gobernador Bernardo de Velasco al monarca, la dificultad residía ahora en dar cumplimiento a los nuevos Reglamentos Militares.<sup>5422</sup> En la Real Renta de Tabaco estaban matriculados como cosecheros, a juicio del Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,<sup>5423</sup> y del Ayudante Mayor Veterano Miguel Antonio de Herrero,<sup>5424</sup> en un escrito recientemente hallado, sólo los más pudientes y acomodados, habiendo quedado en el servicio de Milicias "...únicamente los más pobres que no tienen como atender a las fatigas del Real Servicio, por falta de caballos".<sup>5425</sup> Poco importaba que se hubieran completado las plazas en las compañías,

"...si las más de las veces no han de poder ocurrir cumplidamente a los sitios señalados, y que cuando lo verifiquen ha de ser sin armas por no haberlas en la Provincia ni como comprarlas no costeándolas Su Majestad".<sup>5426</sup>

#### **S-V La composición étnica de la oficialidad y tropa.**

La incidencia de los conflictos entre la Milicia y el poder político en la estratificación y movilidad social de la sociedad colonial variaba con la composición étnica de la oficialidad y tropa, en especial con la presencia de milicianos peninsulares, como fué el caso de la importación desde España de Regimientos Disciplinados de Veteranos,<sup>5427</sup> en ocasión de la Expedición Demarcatoria de Límites con Portugal (1754), encabezada por el Marqués de Valdelirios,<sup>5428</sup> y el Gobernador de Buenos Aires General José de Andonaegui, y la Expedición de Don Pedro de Cevallos para la recuperación de la Colonia de Sacramento (1778),<sup>5429</sup> pues su instalación daba lugar a que se manifestaran rencores contra los peninsulares.<sup>5430</sup> En La Rioja, del informe de los episodios en que el pueblo Riojano manifestó su repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes, elevado en 1784 por el Subdelegado de la

Real Hacienda y Ministro Tesorero de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte, surgía que estaban persuadidos que son mal vistos los Milicianos Juan Díaz y Felipe Torres, no sólo por la calidad de sus empleos, que portaban derecho al fuero, sino por la condición de Europeos, "...creyendo que hay Partido en los del País contra ellos y sus providencias".<sup>5431</sup>

## **S-VI La rigidez de los códigos disciplinarios existentes.**

La incidencia de los conflictos entre la Milicia y el poder político en la estratificación y movilidad social variaba también con la rigidez de los códigos disciplinarios existentes. Archer (1981,1982) y Mayo (1987) han sido de los primeros en abundar en este particular tópico de la vida militar colonial.<sup>5432</sup> En épocas y lugares donde dichos códigos eran más flexibles las posibilidades de ascenso social por parte de los miembros de las castas era más factible, y viceversa.<sup>5433</sup> En Córdoba, en 1744, se originó una discordia por la actitud de los milicianos que

"...atemorizan y amilanan todos y cada uno de por sí a la Gente de su comando en esta jurisdicción con amenazas, otros con cohechos, y ofreciéndoles aora partido en las corridas y entradas a las tierras del bárbaro enemigo".<sup>5434</sup>

Quince años después, en 1759, y en vísperas de las Reformas Militares, en Corrientes, ciudad donde existían cuatro compañías, con 1440 milicianos para 1760, y con 1021 milicianos para 1769,<sup>5435</sup> Sebastián de Casajús,<sup>5436</sup> le señalaba al Gobernador, que la jefatura de las mismas

"...han estado ocupadas de treinta años a esta parte de unos hombres que ni por sí ni por su linaje o nacimiento debieran ser dignos ni para cabos de escuadra, y aún los más de ellos ni de servir entre españoles".<sup>5437</sup>

Transcurridos otros diez años, en 1771, el Presidente de la Junta de Temporalidades de Córdoba Cayetano Terán Quevedo,<sup>5438</sup> le manifestaba al Gobernador de Buenos Aires Juan José de Vértiz y Salcedo que la tropa y los oficiales porteños que el Teniente Gobernador Fernando Fabro llevó a Córdoba para ejecutar la Orden Real de expatriación de los Jesuitas no servían para otra cosa que para "...fomentar las escandalosas turbulencias que llevo expresadas".<sup>5439</sup> Otra década más tarde, en 1781, y como aparente repercusión de los Reglamentos u Ordenanzas Militares impuestos en Cuba y Nueva Granada, en La Rioja, el Administrador de la Renta de Tabacos y Capitán de Milicias José Antonio Mercado,<sup>5440</sup> fué arrestado bajo la acusación de haber esquilado a sus propios soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas.<sup>5441</sup> Mercado estaba al frente de las tropas que en el Chaco salteño guarnecían la frontera de San Fernando del Río del Valle.<sup>5442</sup> Y en Buenos Aires, en las mismas vísperas de la Revolución de Independencia, sus Cabildantes describen a los oficiales reclutados por Liniers como "...los que tienen aún pendientes sus causas por ladrones".<sup>5443</sup> Tan era así que el honor, ingrediente imprescindible a todo estamento, se lo consideraba en tiempos coloniales casi perdido, debido al reclutamiento generalizado de mestizos y mulatos. En Salta, la anteriormente citada denuncia de Arrigunaga, aclaraba que en 1806 el Regimiento Miliciano era

"...por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción, insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo

desobedientes a prestar auxilio a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".<sup>5444</sup>

Al momento de montar las distintas guardias semanales, las compañías de milicianos se hallaban por lo general incompletas. Pero si esto era habitual ello obedecía a que sus jefes le otorgaban a sus milicianos generosas dispensas para ausentarse. En Cochabamba, provincia donde existían veintidós compañías de milicias, es decir cerca del millar de milicianos, el Subdelegado de Revista de Santa Cruz de la Sierra Manuel Ignacio de Zudáñez, informaba al Virrey en 1777 que los jefes de compañía dispensaban a sus milicianos del servicio "...haciéndose cargo de la necesidad y miseria de estos pobres".<sup>5445</sup> Para cualquier misión o "fatiga" militar que se les ordenare, los milicianos estaban sujetos al "toque de caja".<sup>5446</sup> Más aún, cuando salían a campaña contra los bárbaros infieles, Zudáñez aclaraba, para justificar su reclamo de fuero militar, que con ellos "...jamás camina vibandero de cuenta del Rey por que cada uno lleva consigo lo necesario respecto a su pobreza".<sup>5447</sup> En Tarija, los Regimientos son

"...el común asilo de los que pretenden substraerse del tributo: el ser soldado se reputa, en lo vulgar, por título de sangre, difundiéndose por infinitas relaciones y Parentescos; de manera que la India casada con soldado, se llama soldada, y se rebiste de la condición del marido; y aunque después de muerto este, se case con Indio, o tenga hijos naturales, nazen soldados, y se hazen alistar en edad competente sin que lo puedan estorbar los Gefes y Capitanes que no comprenden, en muchos casos, las Leyes generales tributarias".<sup>5448</sup>

Asimismo, los regidores del Cabildo de Tarija se quejaban que

"...muchos capitanes no conocen a los soldados de su compañía, los que por lo común viven tan dispersos, en distintos pagos de estos valles, que el Cabo en un caso urgente y acelerado no los puede juntar, y para ello necesita de otros tantos oficiales y mensajeros para llamarlos a quartel".<sup>5449</sup>

Y en la Banda Oriental, los oficiales a cargo de guarniciones militares fueron los factores activos de una masiva movilización campesina en pos de vaquerías o corambres. En la Guardia del Paso del Rey (Banda Oriental), Andrés Fernández, natural de la Villa Rica y vecino del Camacuá, mayor de 30 años, de oficio labrador, prendido más allá del Fraile Muerto por la gente de la partida del Corregidor Antonio Pereira, dijo en 1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en aquellos dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, constándole asimismo que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales, como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Alvarez con su gente".<sup>5450</sup>

Finalmente, los conflictos entre la Milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, también se les otorgó el goce del fuero militar a los Contadores y Tesoreros de las Cajas Reales principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.<sup>5451</sup> Sin embargo, como se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que

delinquieren en el oficio político.<sup>5452</sup> Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de trabajo.

## Capítulo II-H-23

### **Crisis militar y resistencia a reprimir en la disputa entre Comandantes de Armas y una burocracia subordinada (Gobernadores y Corregidores)**

#### Índice

- T-I Tradición historiográfica en materia de crisis militar
- T-II Insurrección de originarios y presencia de militares peninsulares.
- T-III Conflictos entre Comandantes de Armas y Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias.
- T-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los originarios
- T-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.
- T-VI Rebelión de Oruro y la complicidad con la insurrección de originarios
- T-VII Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.
- T-VIII. Discriminación racial en la plana mayor de oficiales.
- T-IX. Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.

#### **T-I Tradición historiográfica en materia de crisis militar**

Gran parte de los teóricos que estudiaron la denominada revolución de independencia asignan su origen a la creciente crisis de la Milicia. Entre las crisis políticas que pusieron en jaque el barroco edificio de la sociedad estamental colonial, la que más habría incidido en el intento de demolición fue sin duda la crisis militar, la cual se expresó entre otras formas en la ruptura de los privilegios del fuero militar y del nepotismo militar. Mientras la tropa de los ejércitos del orden colonial-absolutista estaba formada por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano, la oficialidad estaba constituida por un conjunto inflado de posiciones honoríficas. La ruptura de los privilegios se hizo evidente una vez que la recolonización Borbónica de fines del siglo XVIII entró a combatir la creciente criollización de la plana mayor de las Milicias, provocada por las intensas y antiguas prácticas patrimonialistas. Este combate se intensificó a partir de la derrota sufrida por la insurrección indígena (1781) y la expansión mercantil iniciada en dicha década. Por ello, Morón (1988), fundado en Kuethe (1979), sostuvo que la intervención de las fuerzas militares veteranas en el seno de las fuerzas disciplinadas indianas no tuvo un carácter puramente instrumental sino político pues se orientaba en grado superlativo a garantizar la adhesión de los vasallos americanos a la realeza peninsular.<sup>5453</sup> Las tesis de Roberts (1938) y Halperín Donghi (1979), que remontan el origen de la crisis militar a la conciencia criolla que las Milicias adquirieron con la derrota sufrida por los británicos en Buenos Aires a comienzos del siglo XIX, encontraría entonces antecedentes más antiguos.<sup>5454</sup>

En lo que habría constituido un antecedente inmediato de la llamada revolución de independencia, la corona --mediante las políticas centralizadoras y anti-patrimonialistas-- logró que los patriciados, o elites criollas locales, representadas por sus Comandantes de Armas y sus Cabildos seculares y eclesiásticos, intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos y Oidores. En el sentido apuntado por las tesis de Kuethe y Morón, cabe entonces preguntarse si los conflictos en el seno de las Milicias, y entre éstas y el Estado, se hallaban o no relacionados con los procesos de criollización de la sociedad colonial. Los conflictos entre las milicias y el estado se habrían manifestado en las luchas por los ascensos, los premios, los destinos, las plazas de cadetes, los repartos de mercancías y el comercio fronterizo, y la participación en las entradas al desierto, las cuales reflejarían las contradicciones por la ocupación del aparato militar del estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites criollas locales. En las contradicciones entre las milicias y el estado colonial, estudiaremos los casos en que las Comandancias de Armas se enfrentaron --con motivo de los conflictos suscitados por las tribus y comunidades indígenas-- a los Cabildos, los Gobernadores y los Tenientes-Gobernadores. Para estudiar estos casos, hemos seleccionado una docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

## **T-II Insurrección de originarios y presencia de militares peninsulares.**

La incidencia de los conflictos entre la milicia y el poder político variaba con la composición étnica de la oficialidad y tropa, en especial con la presencia de militares peninsulares, como fue el caso de la importación desde España de Regimientos Disciplinados de Veteranos,<sup>5455</sup> en ocasión de las Guerras Guaraníticas y la Expedición Demarcatoria de Límites con Portugal (1754), encabezada por el Marqués de Valdelirios y el Gobernador de Buenos Aires General José de Andonaegui, y la Expedición de Don Pedro de Cevallos para la recuperación de la Colonia de Sacramento (1778),<sup>5456</sup> pues su instalación daba lugar a que los criollos expusieran sus rencores.<sup>5457</sup> Con la primera amenaza británica, ocurrida en la década del 70, llegó al Río de la Plata en 1774 el Regimiento de Infantería de Galicia (dos batallones), hasta que cuatro años más tarde, en 1778, fue reemplazado por el II Batallón del Regimiento de Infantería de Saboya.<sup>5458</sup> Pero en el Alto Perú, durante la revuelta de Túpac Amaru (1782), a falta de Regimientos de Veteranos se armó a los mestizos de Chuquisaca en un cuerpo de milicias patricias.<sup>5459</sup>

Derrotada la insurrección indígena, y dada la contradictoria conducta demostrada por las planas mayores de las Milicias, constituidas por criollos, a comienzos de la rebelión, y la altivez demostrada a posteriori de la misma,<sup>5460</sup> la corona urgió el envío de más oficialidad y tropa de ejército, disciplinada o veterana, compuesta de regimientos de peninsulares, de índole puramente rotativa o de refuerzo.<sup>5461</sup> En efecto, luego de dicha Rebelión, fueron llevados a Potosí y Charcas desde el Perú, los Regimientos de Granaderos de Soria y de Extremadura,<sup>5462</sup> y a Montevideo desde España el Regimiento de Infantería de Burgos.<sup>5463</sup> La presencia del Regimiento de Extremadura --destacada por la índole de sus uniformes, que contaban con una casaca colorada, y por el privilegio del fuero militar-- generó en Charcas en 1785, con motivo de un incidente policial en el que un granadero dio muerte a un mestizo, una conmoción o tumulto popular,<sup>5464</sup> conocida como revolución de los muchachos. Esta sublevación fue liderada por el profesor de la

Universidad de Charcas Juan José Segovia,<sup>5465</sup> en aparente connivencia con el Gobernador-Intendente General Ignacio Flores.<sup>5466</sup> Como consecuencia inmediata, Flores puso en pié nuevamente a una compañía de milicias mestiza, para más luego ser destituido por el Virrey Loreto.

Las campañas militares en la segunda mitad del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes; las expediciones porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII, contra la Rebelión de los Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y más luego por Fernando de Mompóx y Antonio Ruiz de Arellano (1735),<sup>5467</sup> o la expedición porteña del Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de las llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56) -- derivación del Tratado de Permuta con Portugal (Madrid, 1750)-- registraron una numerosa serie de desertiones. Es de advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano. Tan fue así, que el 20 de Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y libertos se alistaran en las fuerzas que se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de indios "tapes" rebeldes.<sup>5468</sup> En la Primera Expedición de Misiones desertaron 25 hombres.<sup>5469</sup> En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 1752, los tercios de La Rioja y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.<sup>5470</sup>

### **T-III Los conflictos entre Comandantes de Armas y Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias.**

Las constantes insurrecciones y guerras étnicas entre las diversas naciones indígenas de las fronteras del Alto Perú, Chaco, Paraguay, Litoral y Araucanía también generó intensos conflictos en el seno de la burocracia militar colonial, entre los Comandantes de Armas mismos y entre éstos y las demás autoridades coloniales: Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias. Los Comandantes de Armas, a juicio de Beverina (1935) y Cabodi (1950), amén de las funciones puramente militares ejercían atribuciones judiciales y policiales dentro de los límites geográficos de su destino militar.<sup>5471</sup> Pero a diferencia de los Alcaldes Provinciales y los Alcaldes de Hermandad, los Comandantes de Armas no dependían de los Cabildos sino de los Gobernadores o Gobernadores-Intendentes.<sup>5472</sup> En cuanto, a los Corregidores y Tenientes de Rey, a diferencia de los Regidores, no debían ser naturales ni vecinos de la población donde hubieren de ejercer su función, motivo por el cual sus decisiones solían provocar numerosas resistencias.<sup>5473</sup>

Con motivo de las levadas organizadas por los Gobernadores, para las Entradas al Chaco, los Comandantes de Armas se resistían a cumplir las órdenes impartidas por éstos. En el caso de los Gobernadores Juan Victorino Martínez de Tineo,<sup>5474</sup> y Juan de Pestaña Chumacero, los Comandantes de Armas --en las localidades sufragáneas de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, como los Valles de Catamarca, La Rioja, y Córdoba, durante las décadas de 1750 a 1770-- imponían periódicamente en forma compulsiva, con la excusa de la falta de pago de los sueldos, autoridades políticas interinas.<sup>5475</sup> En la propia Córdoba, en 1753, el Comandante de Armas Félix de Cabrera,<sup>5476</sup> y los cabildantes Gerónimo Luis,<sup>5477</sup> Juan Agustín,<sup>5478</sup> y José Gregorio Echenique,<sup>5479</sup> Gregorio Arrascaeta,<sup>5480</sup> José de Arrascaeta,<sup>5481</sup> Marcos Ascasubi,<sup>5482</sup> y José de Molina Navarrete,<sup>5483</sup> quienes se habían resistido a colaborar con la Entrada a

tierras de los indios Abipones, solicitaron al Consejo de Indias, en defensa de los fueros de Córdoba, que el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,<sup>5484</sup> "...no usase de las providencias concedidas a los gobernadores y capitanes generales".<sup>5485</sup> Argumentaban los citados cabildantes, que al igual que en Buenos Aires, los Tenientes de Rey deberían ejercer sus funciones sólo en la jurisdicción militar y "...en raro caso, la [jurisdicción] ordinaria [o civil]".<sup>5486</sup> En 1763, en Corrientes, tuvieron lugar tres rebeliones de neto corte militar. La primera, le ocurrió al Comandante Bernardo López, en Diciembre de 1762, primero cuando se dirigía al Chaco, bajo la excusa "...que llevaba errado el rumbo", y luego cuando se dirigía a la Colonia del Sacramento, para recuperarla de los Portugueses, desertándole la tercera parte de la tropa.<sup>5487</sup> Y la tercera, se originó un año más tarde, en Octubre de 1763, en la sublevación de la gente de Guerra que Don Bonifacio Barrenechea conducía a las Fronteras del Río Pardo,

"...a quien los mismos soldados en el día primero de la marcha lo prendieron, pusieron grillos, condujeron a la ciudad, lo privaron del empleo de Sargento Mayor y ejecutaron los demás desórdenes que allí son públicos".<sup>5488</sup>

Fue esta rebelión la antesala más inmediata de la llamada Revolución de los Comuneros de Corrientes, ocurrida otro año más tarde, en 1764, y que por estar vinculada con conflictos eclesiásticos está detallada en otro trabajo de este autor. En agosto de 1765, en la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, provincia del Paraguay, al año de haberse producido la Rebelión Comunera de Corrientes, el Teniente Mayor Juan Ignacio González Vexarano y el Sargento Mayor Juan de Villalva, alias Juan Gordo, se amotinaron contra las autoridades militares y civiles. El Teniente General Bartolomé Larios Galván, aparentemente apoyado por Don Sebastián de León y Don Salvador Cabañas, pretendía destinar "...una armada para cierta campaña", bajo amenaza de ser "pasados a cuchillo" si se resistían.<sup>5489</sup> Diez años más tarde, en 1774, los moradores del Curato de Traslasierra,<sup>5490</sup> donde estaba destinado uno de los cinco regimientos que custodiaba la frontera cordobesa, se sublevaron contra las autoridades designadas por el Cabildo de Córdoba. Encabezados por Basilio Quevedo, y asesorados por Enrique Olmedo,<sup>5491</sup> y Joaquín Güemes Campero,<sup>5492</sup> los vecinos de Traslasierra se sublevaron primero contra la remoción de su Cura Párroco, el Dr. Simón Tadeo Funes,<sup>5493</sup> e inmediatamente después, con la defensa del Dr. Dalmacio Vélez, contra el despotismo de los peninsulares y Maestres de Campo José de Isasa y Ayesta,<sup>5494</sup> y José Tordesillas,<sup>5495</sup> protegidos del Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>5496</sup> así como contra el servicio gratuito en la frontera, el Estanco del Tabaco y el pago de la sisa y la alcabala.<sup>5497</sup> Barrionuevo Imposti (1968) relata, en un fascinante ensayo, fundado en un expediente de la Serie Gobierno, existente en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), como dicha rebelión fué inicialmente amortiguada por una negociación conocida como el Pacto de los Chañares, concertada por los rebeldes con el Maestre de Campo Juan Tiburcio Ordóñez,<sup>5498</sup> perteneciente a una facción capitular de Córdoba opuesta al clan de los Allende.<sup>5499</sup> Pero posteriormente, el Cabildo de Córdoba desconoció el pacto y encomendó al Coronel de Milicias José Benito de Acosta,<sup>5500</sup> su represión, pagando Quevedo su atrevimiento con la cárcel. La cuestión fué llevada a la Real Audiencia de Charcas, pero de su expediente no habrían quedado rastros.

#### **T-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los originarios.**

Las rebeliones en La Rioja y Traslasierra continuaron en la década del 80. En un expediente de la serie de Hacienda, donde se halla un Informe elevado en 1784 por su

Cabildo al Gobernador-Intendente de Córdoba, se encuentra como prueba de actos subversivos un pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que denominaremos para su identificación posterior "Décimas de Protesta". Su autor, un verdadero precursor de la poesía de la emancipación, que probablemente influyera en la letra de nuestro Himno Nacional, no sería otro que el mismo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán que dos años después compuso unos versos en décimas denominados ***Décimas Correctivas***, primero publicadas por Grenón (1922), y veinte años después reproducidas por Carrizo (1942).<sup>5501</sup>

También regiones del Alto Perú sufrieron el embate de los conflictos internos de la milicia. Debido a la conducta observada en la lucha contra los indios Chiriguano, calificada por el Cabildo de Tarija del 20 de abril de 1778 como cobarde,<sup>5502</sup> el Regidor Decano y Alcalde de Primer Voto Coronel Luis Hurtado de Mendoza,<sup>5503</sup> íntimo amigo de José Antonio Arce,<sup>5504</sup> fue separado de su cargo militar.<sup>5505</sup> Dos años más tarde, en 1780, en represalia por la humillación sufrida, Hurtado separó de sus empleos y cargos públicos a los Beneméritos miembros del Cabildo "...que habían sacrificado su salud e intereses en el servicio de la Patria", inhabilitándolos por el espacio de ocho años, y subrogando en su lugar a los que como Ignacio San Martín "...no tenían otro mérito que su ciega adhesión a Arce, y criminal disposición para sacrificar la Patria a sus más inicuos y sórdidos intereses".<sup>5506</sup> El conflicto del Comandante de Armas de Tarija con el Cabildo y la Misión Franciscana de las Salinas se volvió a repetir en 1781 debido a la oposición generada por la desmedida aniquilación y empobrecimiento de todo el vecindario y Misión "...con las Derramas a que fue obligado para la mantención de los soldados", más de mil y quinientos hombres, mayoritariamente indios y mulatos, reclutados para combatir a los indios Chiriguano.<sup>5507</sup>

## **T-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.**

Tampoco Cuyo quedó atrás en materia de conflictos. Ya en 1764, el mismo año en que se producen las rebeliones Comuneras de Corrientes y de Curuguaty, el Teniente Corregidor de San Juan Francisco Xavier Garramuño,<sup>5508</sup> fuertemente enfrentado a los linajes capitulares de los Albarracín, los Irrazábal y los Sánchez de Loria, fue asesinado por una pandilla compuesta por dos cristianos y seis indios.<sup>5509</sup> En el caso particular de Mendoza, el Cabildo mantuvo una actitud ambigua pues compuesto por criollos cerró filas primero junto a la milicia contra las autoridades políticas con sede en Chile, que pretendían se iniciara una guerra contra los indígenas. Cuando Mendoza aún pertenecía en 1778 a la Capitanía General de Chile, el Alcalde Francisco Xavier de Rozas,<sup>5510</sup> ligado a una de las tres casas reinantes de Cuyo, se quejaba contra el Corregidor Jacobo Badarán y Bustillos,<sup>5511</sup> por los excesos, injurias e improperios que ejecutó por escrito y de palabra contra el Cabildo de Mendoza.<sup>5512</sup> El motivo de la queja se habría originado en el sospechoso interés de Badarán por llevar guerra ofensiva contra los indios Huiliches, los tradicionales enemigos de los Pehuenches.<sup>5513</sup> En los autos con el Comandante de Frontera José Francisco Amigorena,<sup>5514</sup> el Capitán Nicolás Santander y Corvalán,<sup>5515</sup> manifestaba que mientras dependió la jurisdicción de Cuyo de la Capitanía General de Chile

"...no hubo facultad para ofender a los Indios en la menor parte, y sí expresísimas prohibiciones que se hallaban archivadas, para que no se les hiciese Guerra ofensiva y puramente se estuviese a la defensa".<sup>5516</sup>

Su queja habría tenido éxito en la Real Audiencia de Chile por cuanto Badarán fue sustituido por el Maestre de Campo José Sebastián de Sotomayor,<sup>5517</sup> fundador a su vez de otra de las llamadas tres casas reinantes en Mendoza.<sup>5518</sup> Pero más luego, el prestigio adquirido por Amigorena, en su conducta con los indios de la frontera sur, provocaba la lógica envidia de los miembros del Cabildo mendocino. Dicho Capitán Nicolás Santander, denunciaba que el Comandante de Frontera Amigorena, le disputaba el superior mando de Armas al Corregidor Jacinto de Camargo y Loayza, designado a instancias del Fiscal de la Real Audiencia de Chile Dr. José Perfecto de Salas.<sup>5519</sup> Dicho mando lo disputaba "...a cara descubierta diciendo [que Camargo] no tenía acción si no en lo Civil, y advocándose el absoluto mando en lo Militar".<sup>5520</sup> Por el contrario, el ex-Alcalde Francisco Videla y Aguiar,<sup>5521</sup> fué desterrado en 1782, conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta,<sup>5522</sup> por motivos aún no muy aclarados, pero que se especula se refieren a la crisis social iniciada con la Expulsión de los Jesuitas y desatada por la negativa de los mulatos libres y esclavos de la finca del Carrascal, perteneciente al Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín, a ser exportados a las minas de oro de La Serena, Chile;<sup>5523</sup> o a la negativa de las Milicias Cuyanas a participar de la represión de los seguidores de Túpac Katari.<sup>5524</sup>

#### **T-VI Rebelión de Oruro y complicidad con la insurrección de originarios.**

En oportunidad de la rebelión indígena encabezada por Túpac Katari, los azogueros de áreas periféricas como Oruro, perteneciente a la Gobernación-Intendencia de Charcas, que no gozaban del privilegio de la mita o del azogue, se hallaban apremiados por la presión fiscal que ejercía la burocracia Borbónica y por la presión financiera que imponían los acreedores peninsulares como José de Endeyza y Alvear,<sup>5525</sup> Manuel de la Bodega y Llano,<sup>5526</sup> y Pedro de Lagrava,<sup>5527</sup> posteriormente ajusticiados por los indígenas. Dichos azogueros, como fue el caso del Regidor Decano Manuel Serrano,<sup>5528</sup> los Procuradores Generales Manuel de Aurrecoechea,<sup>5529</sup> y Clemente José Menacho,<sup>5530</sup> y los Alcaldes y Oficiales de Milicia Domingo Urquieta,<sup>5531</sup> Isidro de la Riva,<sup>5532</sup> Domingo de Herrera y Galleguillos,<sup>5533</sup> Jacinto Rodríguez de Herrera,<sup>5534</sup> y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,<sup>5535</sup> en sus comienzos se solidarizaron con la revuelta, coaligándose con los indígenas,<sup>5536</sup> para más luego, en virtud del "miedo" generado por la virulencia de la movilización indígena, se volcaron al bando peninsular y encabezaron la represión.<sup>5537</sup> Esta contradictoria actitud les significó, que luego de producirse la derrota indígena, sus conductas fueren juzgadas, y en 1785, con la defensa del Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, sus bienes fueren secuestrados y sus personas remitidas presas a Buenos Aires.<sup>5538</sup>

#### **T-VII Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.**

En Tucumán, localidad supeditada a la Gobernación de Salta, la discordia entre los cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores se producía por resistirse los primeros a participar de la represión al alzamiento de Túpac Amaru.<sup>5539</sup> La excusa para rebelarse se fundó en que el Gobernador-Intendente de Salta los había humillado, al reclutar en calidad de soldados rasos y no de oficiales al Comandante de Armas de Tucumán Coronel Fermín Vicente de Texerina y Barreda,<sup>5540</sup> al Capitán Manuel Pérez Padilla,<sup>5541</sup> y al Teniente Coronel del Regimiento de Santiago del Estero Martín Ángel Varón.<sup>5542</sup> Su apoderado, Joaquín Monzón,<sup>5543</sup> alcanzó a denunciar dicho reclutamiento como una verdadera humillación. En realidad, el conflicto se había iniciado en 1778 cuando el Gobernador de Salta, alimentado por los resentimientos generados en la llamada Rebelión de 1767 contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,<sup>5544</sup> anuló las

elecciones del Cabildo de Tucumán y nombró por Alcalde de primer voto a Miguel Laguna,<sup>5545</sup> y de segundo voto a Joaquín Díaz.<sup>5546</sup> También en La Rioja, en 1781, en ocasión del envío de las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle,<sup>5547</sup> --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- el Administrador de la Renta de Tabacos de La Rioja José Antonio Mercado,<sup>5548</sup> fue arrestado bajo la acusación de haber sublevado las tropas. A más de haber abandonado el relevo, Mercado fue acusado de haber esquilmado a sus soldados con el juego y la venta de bebidas espirituosas.<sup>5549</sup> En realidad, las tropas habían sido sublevadas por el Comandante de Armas Juan José de Villafañe y Dávila,<sup>5550</sup> "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo, compuesto de sus allegados y parientes, el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".<sup>5551</sup> Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe apareciese como de Mercado.<sup>5552</sup> En Buenos Aires, con motivo del malón indígena sufrido por la población del pago de Luján, en agosto de 1782, y el infortunado resultado del combate de la Laguna de Esquivel, el Comandante de Frontera Juan José Sarden, peninsular, fue acusado de cobardía por el Sargento Mayor Francisco Julián de Cañas,<sup>5553</sup> y sometido a un Consejo de Guerra, del cual a pesar de salir absuelto de culpa y cargo el monarca lo cambió de destino ordenándole retornar a España.<sup>5554</sup> Tres años más tarde, en 1785, con motivo de la sedición de unos indios Guaraníes establecidos en Gualeguay, Entre Ríos, se provocó un sonado conflicto del cual resultó la prisión y suicidio del ex-Alcalde Provincial Francisco Méndez,<sup>5555</sup> y el procesamiento del Comandante de Asamblea de Caballería Teniente Coronel Tomás de Rocamora.<sup>5556</sup> Rocamora, quien ya se había enfrentado con anterioridad a los terratenientes santafesinos que reclamaban la posesión de gran parte de lo que hoy es Entre Ríos, habría sido esta vez objeto de la venganza de los terratenientes Entrerrianos Juan Carlos Wright, María Martina Pranz,<sup>5557</sup> Pedro García de Zúñiga,<sup>5558</sup> José González de Bolaños, Francisco Ormaechea, Ignacio Elzaurdi,<sup>5559</sup> José Cevallos,<sup>5560</sup> y Francisco Pajón,<sup>5561</sup> por haberse opuesto a la extensión de sus latifundios.<sup>5562</sup> En su réplica, asesorado por el Dr. Mariano Irigoyen,<sup>5563</sup> Rocamora reconocía que los pocos hacendados de aquellos parajes se hallaban

"...resentidos contra mí, porque sosteniendo los Derechos de la Población, contradecía, no a los inmensos terrenos que aunque con compras afectadas ya poseían, sino a las nuevas adquisiciones a que obtaban, en perjuicio de los comunes creados y a crear: sabían bien que los Cabildos establecidos, pobres, estúpidos, y recientes, y acostumbrados a sufrir en particular los golpes del Despotismo, no habían criado todavía el nervio necesario para oponérseles, y únicamente se sostenían con el constante apoyo de su fundador; así se propusieron desconceptuarme y removerme para sofocarlos en su cuna y seguir ellos su ambiciosas miras".<sup>5564</sup>

Y otros cuatro años después, en 1789, el Síndico Procurador General del Cabildo de San Fernando de Maldonado, Antonio Duarte, entró en conflicto con el Comandante Militar Capitán de Ejército Francisco Climen.<sup>5565</sup> Si una Sala de tanta autoridad como la de los Sres. Alcaldes del Crimen, no podía arrestar a los Jueces ordinarios sin consulta y asenso del Virrey, se preguntaba el Dr. Domingo Paz y Echeverría,

"...¿podrá el Comandante Militar de Maldonado, sin jurisdicción alguna en lo civil y político, arrestar y hacer conducir a su presencia a aquel Alcalde ordinario, como si fuera un reo de estado, sin ajamiento de las preeminencias o exemciones de su carácter y empleo, y escándalo del público?".<sup>5566</sup>

A fines de siglo, en la Expedición que en 1800 se organizó en la Banda Oriental contra los indios Charrúas y Minuanes, el Comandante de Frontera Jorge Pacheco,<sup>5567</sup> fue cuestionado por el Teniente Gobernador de Yapeyú Francisco Bermúdez,<sup>5568</sup> y acusado por el que luego fuera su propio consuegro, el Capitán Benito Chain, de despotismo en el tratamiento de los pobladores de Paysandú.<sup>5569</sup> Y en el Paraguay, con motivo de la cruel muerte de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida en 1796 por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez,<sup>5570</sup> el Alcalde de Asunción José del Casal y Sanabria fue detenido y remitido con escolta a Montevideo, y en mayo de 1799, con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictamen del Lic. Tomás Antonio Valle, fué absuelto de culpa y cargo.<sup>5571</sup> Casal y Sanabria, amigo del ex-Gobernador Pedro de Melo y Portugal, habría sido objeto de la venganza del Gobernador Lázaro de Rivera por: a) haberse opuesto al proyecto del Cabildo, compuesto por comerciantes peninsulares,<sup>5572</sup> de estancar (monopolizar) la comercialización de la yerba; b) haberse opuesto a la licencia otorgada al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos [de indios] de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real"; y c) haber servido al Virrey Marqués de Avilés al hospedar a los sabios naturalistas Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal, empresa en la cual Avilés había invertido gran parte de su gestión.<sup>5573</sup>

#### **T-VIII. Discriminación racial en la plana mayor de oficiales.**

Luego de la Reconquista de Buenos Aires, y en vísperas de la Revolución, a tal extremo estaba discriminada racialmente la plana mayor de oficiales,<sup>5574</sup> entre peninsulares (Catalanes y Vizcaínos) y criollos (Patricios), que los miembros de las castas (Pardos y Morenos), acudían a todo tipo de estratagemas para lograr incorporarse a sus filas en calidad de oficiales. En Buenos Aires, Tomás Aquino, luego de casarse y salir de la minoridad,

"...trató de ser oficial de Arribeños, y produjo su Información de Limpieza de Sangre; pero como su dicho padre José Joaquín Castro que estaba vivo era Pardo, y por ello no se le admitía en aquel Cuerpo, fue la información de que no era hijo de él, y sí de otro español".<sup>5575</sup>

También, por estar integrados los cuerpos de milicianos de pardos y naturales (indios y mestizos); algunos Cabildos, integrados mayoritariamente por peninsulares, o españoles europeos, manifestaban su más abierta indignación. En Salta, con motivo de un desfile militar acontecido frente al Cabildo en 1807, sus Milicias Provinciales, dirigidas por sendos criollos, el Coronel Pedro José de Saravia,<sup>5576</sup> y el Teniente Coronel Manuel Antonio Texada,<sup>5577</sup> faltaron el respeto debido al Cabildo, que estaba reunido en pleno. Si bien Acevedo (1965) minimiza la trascendencia de este hecho, nosotros creemos que, por el contrario, el mismo reflejaba un estado de ánimo colectivo en el seno del patriciado, por demás significativo.<sup>5578</sup> Por un lado el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo,<sup>5579</sup> que era peninsular, reaccionando contra la falta de respeto de los oficiales criollos contra la autoridad del Cabildo de Salta, denunció que el Regimiento Miliciano de Salta

"...es por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción, insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo

desobedientes a prestar auxilio a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".<sup>5580</sup>

Profundamente indignados por las expresiones etno-céntricas del peninsular Archondo, los criollos Saravia y Texada contestaron afirmando que

"...es un efecto grosero de mala crianza el asentar que el Regimiento de nuestro mando se forma de blancos, indios y otras castas...¿Por ventura quiere [Archondo] que los soldados sean todos blancos, rubios, y colorados? Pues báysese a las Regiones Septentrionales de la Europa, y allí los encontrará por millares".<sup>5581</sup>

Al soldado, argüían Saravia y Texada, no se le hace información de nobleza para alistarlo, "...ni nos devemos parar demasiado en lo trigueño del color".<sup>5582</sup> Si a Archondo lo fastidiaba la composición étnica del Regimiento de Milicianos, Saravia y Texada concluían que aquel debió "...haberse quedado, o buuelto a su País, pues que nadie lo llamó, ni lo detuvo".<sup>5583</sup>

### **T-IX Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.**

Con las Reformas Borbónicas se da en las colonias de América un proceso de monopolización militar-policial urgido por la creciente crisis social.<sup>5584</sup> En Cabildos como el de Buenos Aires, se libraban despachos de Comisión a las Compañías de Pardos y Morenos para perseguir a los esclavos fugados. A fines de siglo, en 1796, el Capitán y Comandante interino del cuerpo de Morenos libres José García,<sup>5585</sup> fue designado Comisionado para celar la fuga y conducta de los Morenos esclavos, una suerte de Jefe de Cuadrilla de Vigilantes,<sup>5586</sup> o de Sambo Rioplatense.<sup>5587</sup> Pero dos años más tarde, en 1798, por motivos que ignoramos, el Virrey Antonio Olaguer Feliú dio las ordenes para segregarlo a García de dicha labor, derivando la responsabilidad a las Compañías de Morenos "...que están interinamente vajo su mando, como las de Pardos, le auxilien en los casos que lo necesite para el desempeño de la misma comisión".<sup>5588</sup> Finalmente, con la Revolución de Independencia, los Cabildos perdieron su antigua ascendencia sobre las Milicias, quedando los ascensos, promociones y destinos al arbitrio de las propias autoridades militares.<sup>5589</sup>

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las Comandancias de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes, Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se perpetuó en el tiempo, estos últimos no cesaron de enfrentar a los primeros. Por lo demás, estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales.

### **Epílogo Sección II-H**

Finalmente, los conflictos entre la Milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, también se les otorgó el goce del fuero militar a los Contadores y Tesoreros de las Cajas Reales principales y a los empleados de la

Tesorería y la Contaduría General del Ejército.<sup>5590</sup> Sin embargo, como se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquieren en el oficio político.<sup>5591</sup> Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de trabajo.

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las Comandancias de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes, Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se perpetuó en el tiempo, estos últimos no cesaron de enfrentar a los primeros. Por lo demás, estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales.

## **Sección II-I            Acortesanamiento indiano y denuncia del orden nepótico**

Lo que dio lugar al nacimiento de una nobleza indiana no titulada fueron para Céspedes del Castillo (1985), los séquitos de cortesanos y parientes traídos por los Virreyes y Gobernadores.<sup>5592</sup> Por ese motivo, Phelan (1972) y Socolow (1987) enfatizaron que la legislación Habsburga había decretado que ningún Oidor podía casar con una nativa del mismo distrito.<sup>5593</sup> En el Río de la Plata, el proceso de acortesanamiento se vio acentuado con la fundación del Virreinato en 1776, y la asunción de los virreyes portadores del carisma delegado por el rey de España.<sup>5594</sup>

En materia de cargos burocráticos, para ciertos autores, lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios públicos,<sup>5595</sup> sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.<sup>5596</sup> En beneficio de este patriciado o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada voluntad popular,<sup>5597</sup> venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los alcaldes ordinarios, los Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces pedáneos, que no podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia.<sup>5598</sup> Esta restricción en beneficio directo de los clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había logrado mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los electores y los elegidos a un ínfimo núcleo de parientes.<sup>5599</sup> Pero indudablemente, la corriente inmigratoria de comerciantes peninsulares provocó una crisis en el seno de dichos clanes.

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las crisis de los ordenes barroco, patriarcal, estamental, mercantilista, señorial, patrimonial, y corporativo, propias de un moribundo régimen absolutista, en esta última sección nos dedicamos a investigar el proceso de acortesanamiento y las relaciones etnológicas de naturaleza endogámica existentes en el seno de los cabildos, el clero y la milicia, en cuatro sucesivos capítulos: el cortesanismo de la burocracia palaciega y la endogamia en los cabildos del interior del Virreinato, el nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales; el cuñadismo y

vernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense; y el acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial.

## Capítulo II-I-24      **Cortesanismo palaciego y endogamia en los Cabildos del Interior del Virreinato (1760-1790)**

### Índice

- U-I      Cortesanismo o séquitos de lacayos y parientes
- U-II     Tachas capitulares. El caso de Córdoba.
- U-III    Parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.
- U-IV    Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.
- U-V     Aduana, Real Consulado y Tribunal de Cuentas.

### **U-I      Cortesanismo o séquitos de lacayos y parientes**

Para la mayoría de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia colonial lo que determinaba que ésta estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías oligárquicas fue la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos,<sup>5600</sup> y sus consiguientes renunciaciones,<sup>5601</sup> estudiada en otros trabajos de este autor. A ello deberíamos agregar el pronunciado cortesanismo de la burocracia palaciega colonial-absolutista.<sup>5602</sup>

En el sentido apuntado por Céspedes del Castillo acerca del cortesanismo vigente en la burocracia palaciega americana, los séquitos de lacayos y parientes traídos por virreyes y gobernadores, Acevedo (1965) nos revela que en 1763 el Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, influyó en la designación de su sobrino Juan Manuel Fernández Campero,<sup>5603</sup> como Gobernador de Córdoba del Tucumán.<sup>5604</sup> Cuatro años después, en 1767, el Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Javier de Palacios y Aróstegui,<sup>5605</sup> había incidido para que el Gobernador de Córdoba del Tucumán Juan Manuel Fernández Campero nombrara de lugarteniente a su propio sobrino Prudencio Palacios,<sup>5606</sup> yerno a su vez del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León.<sup>5607</sup> Para esa misma época, el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa se quejaba al Conde de Aranda de la nociva influencia que ejercían los parentescos salteños de la mujer del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo.<sup>5608</sup> En efecto, el vecindario y Cabildo de Salta había ganado para sí la voluntad de la Real Audiencia de Charcas, merced a la buena voluntad de su Presidente Martínez de Tineo. Asimismo, el Intendente General de Ejército y Real Hacienda y Caballero de Carlos III Manuel Ignacio Fernández, sostenía en 1779 que la familia del difunto José Perfecto de Salas, refiriéndose a su viuda María Josefa Corvalán de Castilla, ultraja a los vecinos de Mendoza "...porque toma partido en las elecciones de los oficios de República, y en todo lo que suele ofrecerse entre los magnates de aquellos pueblos".<sup>5609</sup>

En la Intendencia de La Paz, Manuel de Fonnegra sostenía que el Subdelegado de Pacajes Joaquín de la Riva, era sostenido por la influencia amenazante que ejercía sobre sus fiadores su padre, el Protector de Naturales Dr. Diego de la Riva.<sup>5610</sup> Y sobre la designación de Francisco Ramos Mexía como Subdelegado de Pacajes en 1806, las

influencias que dejaron su suegro el Brigadier General Sebastián de Segurola y su concuñado Ramón de Ballivián e Igareda. También el Gobernador de Córdoba Campero se quejaba de parecidas influencias que ejercía la esposa del Gobernador Gerónimo Matorras.<sup>5611</sup> La designación de Juan Estéban Tamayo,<sup>5612</sup> en 1796, como Teniente Asesor del Gobernador Intendente de Salta de Tucumán Ramón García de León y Pizarro,<sup>5613</sup> fue sospechada de nepótica por las autoridades centrales, al extremo de permutárselo inmediatamente por José de Medeyros,<sup>5614</sup> que era Asesor en La Paz.<sup>5615</sup> Este último incidió a su vez en el nombramiento de su yerno el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte como Comandante del Fuerte del Río del Valle.<sup>5616</sup> Y el Comandante de Armas de Salta Coronel Gregorio de Zegada,<sup>5617</sup> incidió en la designación de su yerno Diego José de Pueyrredón,<sup>5618</sup> como Comandante del Fuerte de Ledesma y le otorgó en herencia en 1795, en perjuicio de su propio hijo varón, la Subdelegación de Correos de Jujuy. En Paraguay, Diego de los Reyes Balmaceda, quien gobernara en la década de 1720, fue acusado ante la Real Audiencia de Charcas de haber violado el precepto que prohibía a los funcionarios reales contraer matrimonio con quienes pertenecieran al lugar donde se ejercía el cargo, al haberse casado con una paraguaya,<sup>5619</sup> siendo

"...dos de sus cuñados regidores de Cabildo, otro de sus cuñados es nombrado por él Protector de Naturales y finalmente, otro hermano de su mujer es el Superior de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Paraguay".<sup>5620</sup>

Más luego, Rafael de la Moneda,<sup>5621</sup> quien gobernara el Paraguay a comienzos y mediados de la década del 40, fue suegro del Contador de las Reales Cajas de Potosí Fermín de Aoíz y Larrazábal.<sup>5622</sup> Marcos José de Larrazábal,<sup>5623</sup> quien gobernara el Paraguay a fines de la década del 40, fue cuñado del ex-Gobernador del Paraguay Martín José de Echauri,<sup>5624</sup> y del Gobernador de Tucumán Gerónimo de Matorras,<sup>5625</sup> y concuñado del Teniente Coronel de Artillería Juan Antonio Marín de Cáceres,<sup>5626</sup> y del Corregidor Domingo Alonso de Lajarrota.<sup>5627</sup> José Martínez Fontes,<sup>5628</sup> quien gobernara el Paraguay a comienzos de la década del 60, fue padre del Comandante de la Guardia de Rojas Manuel Martínez Fontes; y suegro del Comandante de la Guardia de Luján Francisco González Balcarce.<sup>5629</sup> Agustín Fernando de Pinedo,<sup>5630</sup> quien gobernara el Paraguay en la década de 1770, fue padre del Coronel Agustín José de Pinedo,<sup>5631</sup> y suegro del Corregidor Antonio de Pinedo y Montúfar.<sup>5632</sup> Finalmente, Lázaro de Ribera,<sup>5633</sup> quien gobernara el Paraguay a comienzos del siglo XIX, era concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Teniente Coronel de Artillería Ángel Augusto de Monasterio.<sup>5634</sup>

Con respecto a la propia capital del Virreinato, Buenos Aires, la conexión familiar entre altos funcionarios (Virreyes, Gobernadores y miembros de la Real Audiencia) y linajes nobles de Europa constituyó, al decir de Céspedes del Castillo (1985), una fuente fundamental para la formación de una nobleza local.<sup>5635</sup> Socolow (1987) nos revela como los Virreyes Vértiz y Salcedo,<sup>5636</sup> Loreto,<sup>5637</sup> del Pino,<sup>5638</sup> Olaguer y Feliú,<sup>5639</sup> Sobremonte,<sup>5640</sup> y Liniers,<sup>5641</sup> habían logrado conformar en Buenos Aires una corte de parientes y allegados.<sup>5642</sup>

Hubo asimismo en el interior del virreinato casas patricias, que se beneficiaron de las designaciones hechas por los Virreyes y Gobernadores de origen limeño o porteño. La facultad de confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por los Virreyes, Presidentes de Real Audiencia y Gobernadores, y no por los Alcaldes Provinciales, y los alcaldes de primer voto no podían a su vez titularse Justicias Mayores.<sup>5643</sup> Las rivalidades internas a los patriciados tuvieron entonces más que ver con las actitudes tomadas respecto

a los Tenientes-Gobernadores designados por las autoridades virreinales, los bienes de los Jesuitas y las actividades de la Real Renta de Tabaco y Naipes que con meras aspiraciones a cargos capitulares.

## **U-II Las tachas capitulares. El caso de Córdoba.**

En Córdoba, el Gobernador Campero logró revertir en 1766 la relación de fuerzas existente en el Cabildo de Córdoba promoviendo a un grupo que Romero de Cabrera (1992) caracteriza como una burguesía embrionaria, ubicando para ello como Alcalde de Primer Voto al tercero de los hermanos Allende y Losa, el patricio Santiago de Allende y Losa, y como Alcalde de segundo voto a Enrique Olmedo,<sup>5644</sup> y nombrando como su propio lugarteniente a Prudencio Palacios, el yerno del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León, el cual "...anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dio al Gobernador \$4.000".<sup>5645</sup> Mediante esta dádiva y no obstante que "...era mozo caviloso e inquieto", Palacios obtuvo la confirmación de la Real Audiencia "...por respeto de su tío Oidor [Francisco Xavier de Palacios]".<sup>5646</sup> Por el otro lado, la fracción opuesta al Gobernador Campero, que Romero de Cabrera (1992) caracteriza como feudal, sospechada de estar ligada a los intereses Jesuíticos, la Casa de los Echenique,<sup>5647</sup> había elegido como Alcalde al europeo Cayetano Terán Quevedo.<sup>5648</sup> Para investirlo a Terán con su vara, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo mandó en comisión al General don José Francisco de Galarza.<sup>5649</sup> Pero a fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, con el objeto de deponer

"...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado Francisco José de Uriarte, a un Santibáñez,<sup>5650</sup> sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural;<sup>5651</sup> que en dos días le hizo Capitán, Sargento Mayor y Regidor".<sup>5652</sup>

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General Galarza, fué ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".<sup>5653</sup>

Con el fin de hacer Alcaldes y ganar los Cabildos de las seis restantes ciudades de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, el Gobernador Campero salió nuevamente de Córdoba a principios de Diciembre de 1766.<sup>5654</sup> Para comienzos de 1767, Campero había logrado que se eligieran como alcalde de primer voto del Cabildo de Córdoba a la cabeza más visible del clan de los Allende: el patricio Joseph de Allende y Losa, y como alcalde de segundo voto al antes mencionado Francisco José de Uriarte. A fines de 1767, y no obstante tener cohechados a varios Oidores, con el regalo de más de \$80.000, el mencionado Presidente de la Real Audiencia de Charcas libró Providencias "...para deponer y desterrar al Teniente de Rey, a su yerno Palacios, y a Don Santiago Allende, con el Escribano,<sup>5655</sup> que fueron causa de la muerte de Galarza".<sup>5656</sup> Para su intimación y para hacer cumplir dicha Provisión, "...por no haber quien se animase en la Provincia", la Real Audiencia ordenó al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Bucarelli y Ursúa

"...nombrase un oficial de graduación, que con suficiente tropa, pasase a Córdoba y diese cumplimiento al superior mandato, nombramiento que recayó en [el Comandante de Infantería de Buenos Aires] Fernando Fabro".<sup>5657</sup>

Para 1768, meses después de la expulsión de los Jesuitas, los Allende cohecharon al Teniente de Rey Fabro, de resultas de lo cual impusieron como Alcaldes a los patricios Joaquín de Mendiola,<sup>5658</sup> y Francisco de Armesto y Allende;<sup>5659</sup> y para 1769 a los europeos Phelipe Haedo y de la Sota,<sup>5660</sup> y Melchor Otero.<sup>5661</sup> Cuatro años después, en 1772, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa consiguieron con el apoyo de 500 milicianos armados, en lo que constituyó una grave crisis política, consagrar como alcaldes al Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,<sup>5662</sup> y a José Prudencio Xigena.<sup>5663</sup> Pero en esa misma oportunidad los Alcaldes José Benito de Acosta,<sup>5664</sup> y José de Vejarano,<sup>5665</sup> apoyados por el entonces Gobernador Gerónimo Matorras,<sup>5666</sup> quien había declarado vacantes varios puestos de regidores,<sup>5667</sup> eligieron como alcaldes a Francisco Antonio Díaz,<sup>5668</sup> y al patricio Juan Tiburcio de Ordóñez,<sup>5669</sup> ex-Fiscal de Temporalidades. Si bien el Gobernador Joaquín de Espinosa y Dávalos,<sup>5670</sup> coaligado con los oidores de la Real Audiencia de Charcas, confirmó a los primeros, que eran candidatos del clan de los Allende, los electores de los segundos apelaron ante la Real Audiencia de Lima. Al cabo de tres años de intensa tramitación judicial, Díaz y Ordóñez lograron ser confirmados.<sup>5671</sup> En una palabra, una facción del Cabildo de Córdoba había demandado a su gobernador, antagonizándolo con la Real Audiencia de Lima.

De igual modo, en Córdoba, cuando en 1809 su Gobernador-Intendente Juan Gutiérrez de la Concha --uno de los fusilados con Liniers, Allende y Rodríguez en Cabeza de Tigre-- confirmó para Alcalde de primer voto y para Procurador a aquellos que tenían menor número de votos, dejando fuera del Cabildo a quien como el peninsular Vicente Antonio Bedoya y López de la Madrid, tenía mayor número de sufragios, estalló la última crisis política del Cabildo de Córdoba, previa a la Revolución. La misma se desató, por cuanto, a falta del argumento de la insolvencia, el parentesco en el cuarto grado, o el incumplimiento del hueco,<sup>5672</sup> el Gobernador-Intendente acudió a las antipáticas tachas referentes a la legitimidad del nacimiento del alcalde electo. Esta actitud de Concha debió necesariamente desmoronar el frente interno, por cuanto ponía en tela de juicio la dignidad de muchos miembros de la elite nativa colonial, en especial la de los Gigena Santiestéban, con los cuales los Allende mantenían fuertes lazos de amistad y parentesco. En efecto, Concha hizo presente al Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires que el citado Bedoya, amén de haber estado preso como contrabandista cuando ejercía el cargo de Teniente Visitador de la Renta de Tabaco y Naipes, estaba casado con alguien de "dudosa entidad moral", como María Isabel de Gigena

"...que no solamente es ilegítima sino que también con bastante publicidad se sabe que es de dañado y punible ayuntamiento, como hija de un religioso profeso en mujer casada, ausente el marido y criada en casa separada, que como tal no alterna con las mujeres distinguidas desta Ciudad".<sup>5673</sup>

A esta altura de los entretelones judiciales de la última crisis política acontecida en el Cabildo de Córdoba, Levene (1960) nos cuenta que fué el prócer Mariano Moreno,<sup>5674</sup> quien había asumido la defensa de Bedoya y Recalde, en medio de un clima hostil hacia el Gobernador de Córdoba, inspirado dicho clima por Martín de Alzaga debido a la solidaridad que le había brindado Concha al ex-Virrey Sobremonte, luego de su inaudita fuga frente al invasor inglés.<sup>5675</sup>

### U-III Las parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.

En San Juan, en 1762, el Alcalde Remigio Albarracín,<sup>5676</sup> se vió precisado a renunciar frente a la embestida del Teniente Corregidor Francisco Javier de Garramuño,<sup>5677</sup> y del Administrador del Estanco de Tabaco y Naipes Francisco Suárez de Salcedo.<sup>5678</sup> Más luego, el propio Garramuño tuvo también que renunciar ante la presión del Corregidor Félix José de Villalobos.<sup>5679</sup> En Mendoza, una nueva oligarquía copó, según Comadrán Ruiz (1962), los cargos de Corregidor, Cura Párroco y Vicario Foráneo, Alcalde de primer y segundo voto, Recaudador de Alcabalas, Fiscal de la Vicaría Foránea de Cuyo, Comisario Interino del Santo Oficio, Teniente de Oficial Real y Diputado de la Junta de Temporalidades.<sup>5680</sup> Esta situación dio lugar a numerosas y reiteradas denuncias de los Corregidores Juan José del Risco y Alvarado, y Jacobo Badarán y Bustillos.<sup>5681</sup> En un principio, el ingeniero catalán, arrendatario de los yacimientos mineros de Uspallata, Francisco de Serra y Canals, fue el primero en apuntar la naturaleza oligárquica del patriciado mendocino.<sup>5682</sup>

A propósito de haberse devengado a Serra y Canals sus haberes por las obras del puente sobre el río Desaguadero, sus apoderados José de Almeyda y Jordán y Juan de Santos Preciado, iniciaron unas prolongadas y frustrantes gestiones. Por ese motivo, Canals se vio precisado a formalizar en 1778 una denuncia por el "...estado deplorable en que se hallaba la ciudad de Mendoza". La fuerza de su documento, a juicio del propio Canals, molestó al Fiscal de la Real Audiencia de Chile José Perfecto de Salas,<sup>5683</sup> e "...irritó la parcialidad de las tres casas [reinantes], nombradas Corvalán, Rozas y Sotomayor, quienes tenían aquel Pueblo en una suma opresión".<sup>5684</sup> Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía votar solo para romper el empate entre los Oidores.<sup>5685</sup> Aparentemente, si hemos de estar al documento firmado por Canals, el Virrey Cevallos pensaba en designar Corregidor al propio Canals, pero con motivo del valimiento de Salas, padre de uno de sus más fieles coaligados, fue designado en el cargo de Corregidor Don Jacinto de Camargo y Loayza.<sup>5686</sup> Esta designación manifestaba "...la conligación que ubo entre las mencionadas casas y dicho Corregidor y lo mucho que este se alla obligado con aquella parcialidad, su echura, para el logro de sus venganzas".<sup>5687</sup> Amén de que los dos Alcaldes Juan Antonio Molina Coria,<sup>5688</sup> y Nicolás Corvalán,<sup>5689</sup> eran parientes en primeros grados y de las familias de las mencionadas casas

"...ace mas de veinte años que sucede lo propio, sin que la elección de justicia dexe de verificarse en las citadas parcialidades, de que resulta allarse aquel Pueblo, símil al cautiverio del Faraón".<sup>5690</sup>

Finalmente, a fines de 1778, Almeyda Jordán en carta a Canals, le ruega no deje de decirle al Virrey "...que mire este pobre lugar, quitando la justicia de las casas de Corvalanes, Rozas, y Sotomayor".<sup>5691</sup> En su lugar, Canals le ruega al Virrey se acuerde de Lucas de Neira y Pacheco,<sup>5692</sup> Fernando Jurado,<sup>5693</sup> Andrés Antonio Moyano,<sup>5694</sup> Juan Santos Preciado, Matías Barros, José Marcos Aragón,<sup>5695</sup> Francisco Xavier de la Cruz,<sup>5696</sup> Francisco Videla y Aguiar,<sup>5697</sup> y José Francisco Amigorena.<sup>5698</sup> De este último recalaba Canals que "...era muy especial si no estuviera de Maestre de Campo y otros muchos de integridad que de lo contrario se acaba de perder este lugar".<sup>5699</sup>

#### **U-IV Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.**

En el Paraguay, en 1761, el Gobernador José Martínez Fontes designó a Fulgencio Yegros y Ledesma,<sup>5700</sup> Maestre de Campo, Teniente Gobernador y Justicia Mayor.<sup>5701</sup> Asimismo, casas patricias como la de Cabañas, se beneficiaron con la expulsión de los Jesuitas, mientras que otras, como la de los Yegros mismos, quedaron marginadas del botín. En 1767 el ex-Teniente Gobernador Fulgencio Yegros, acusaba esta situación al manifestar que el ex-Alcalde de primer voto y actual Depositario General Salvador Cabañas y Ampuero,<sup>5702</sup> designado por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de Bucareli y Ursúa como auxiliar del Gobernador del Paraguay Carlos Morphy en la operación de expulsión,<sup>5703</sup> "...con el abrigo de su parentesco, y corpulenta parcialidad, se reputaba por acreedor a mayor exaltación, y me estimaba por intruso, y menos digno de aquella superioridad".<sup>5704</sup> Estos sentimientos lo impulsaron a Cabañas a enviar al Virrey y a la Real Audiencia de Charcas informes que, a juicio de Yegros, carecían de veracidad alguna, y recomendaciones y favores "...que consiguió de los Jesuitas, que con toda franqueza y esfuerzo coadyuvaron, mediante la nueva amistad que asentaron desde que se hizo mi enemigo".<sup>5705</sup> La enemistad de Yegros con los Jesuitas arrancaba del hecho de

"...no haber querido consultarles cosa alguna, ni condescendido a sus injustas peticiones, sino conteníolos en todo sentenciando advertidamente sus pleitos, y destruídoslos en varias partes los mojones, que antes de mi tiempo y durante la impotencia de mi antecesor habían prefixado, con mucho avanzamiento de cierras a diversos rumbos".<sup>5706</sup>

Respecto de las nuevas actividades de la Real Renta del Tabaco y Naipes, su primer Director General Francisco de Paula Sanz, resistido por los vecinos, acusó al Cabildo de Asunción del Paraguay en 1779 de "...ser pasto de los comerciantes de aguas abajo", y de contubernio en la producción de tabaco, tanto en su cantidad como en su calidad.<sup>5707</sup>

#### **U-V La Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas.**

Al igual que la Real Audiencia, las Gobernaciones y la Real Renta del Tabaco y Naipes, a fines de siglo, la Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas, tampoco pudieron escapar al influjo del nepotismo. Este fenómeno se manifestaba en su forma más aguda en las elecciones del Prior, del Cónsul y del Síndico del Real Consulado.<sup>5708</sup> Si bien la exclusión de candidatos por afinidad de segundo o tercer grado fue extinguida en materia matrimonial, en materia política subsistió para impedir en la magistratura "...una conexión de verdadera parcialidad".<sup>5709</sup> Dichas elecciones dieron oportunidad a repetidos cuestionamientos. Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz,<sup>5710</sup> reclamó contra las propuestas que entonces se hicieron de Juan Viola,<sup>5711</sup> para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcano,<sup>5712</sup> para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora Azcuénaga], que sólo era entonces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena".<sup>5713</sup>

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con [Josefa de Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina,<sup>5714</sup> "...no Teniente de Conciliario sino Consiliario actual como Cónsul saliente", el Oidor Juez

de Alzadas dio lugar al planteo.<sup>5715</sup> Por último, este fenómeno se dio también a fines del siglo XVIII en el seno del Tribunal de Cuentas, aunque en éste caso pareciera que las razones no pueden ser atribuidas a meros atavismos clánicos. En efecto, el Virrey Joaquín del Pino había denunciado en la Corte a Juan Andrés de Arroyo,<sup>5716</sup> como cómplice de una "pandilla" de funcionarios que se enriquecían por medio del contrabando.<sup>5717</sup> La Junta Superior de Real Hacienda había declarado por justas las causas de recusación puestas por el Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar,<sup>5718</sup> el Factor Félix de Casamayor,<sup>5719</sup> y el Contador Pedro Medrano,<sup>5720</sup> contra todos los Contadores Mayores del Tribunal de Cuentas.<sup>5721</sup> El Contador Mayor Ramón Miguel de Oromí y Martiller,<sup>5722</sup> había sido recusado por ser pariente afínico, dentro del cuarto grado civil (primos hermanos), de la Señora Ana Gertrudis de Pinedo y Arce,<sup>5723</sup> mujer del Caballero de Carlos III Contador Mayor del Virreinato Juan de Andrés y Arroyo.<sup>5724</sup> Este último, a su vez, como lo ilustra el Cuadro BA-I, fue suegro del Asesor General del Virreinato Don Juan Manuel de Almagro de la Torre.<sup>5725</sup>

En Potosí, la facción liderada por el mercader Juan de Ybieta y Endeyza,<sup>5726</sup> en la cual militaban los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,<sup>5727</sup> y Domingo Antonio de Achával,<sup>5728</sup> y los Regidores Propietarios Joaquín de la Quintana,<sup>5729</sup> y Gregorio Barragán,<sup>5730</sup> se hallaba enfrentada con la facción liderada por el azoguero y Síndico Procurador Coronel Indalecio González de Socasa,<sup>5731</sup> compuesta por los comerciantes Potosinos, que como luego veremos se disputaron la conducción del Situado: Manuel Bulúcia,<sup>5732</sup> Juan Bautista Elorreaga,<sup>5733</sup> Nicolás Ponte,<sup>5734</sup> Nicolás de Oriden,<sup>5735</sup> Francisco Senavilla,<sup>5736</sup> Joaquín Obregón Cevallos,<sup>5737</sup> Martín de Gainza,<sup>5738</sup> y el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,<sup>5739</sup> y por los azogueros Luis de Orueta,<sup>5740</sup> Antonio Vargas y Flor,<sup>5741</sup> y Pedro Antonio Azcárate.<sup>5742</sup> La crisis que analizaremos había estallado el 1 de enero de 1799 con motivo de la elección de Alcalde de primer voto, recaída en el Regidor Propietario Capitán Mariano Torre,<sup>5743</sup> apoyado por la facción azoguera. Luego del acto de calificación de votos, o cabildo extraordinario que llamaban de dudas, y producida la votación que recayó en Torre, el Regidor Quintana, seguido por Ybieta y por Barragán, lo impugnaron

"...con palabras preñadas que indicaron alguna tacha grave que no declaró ninguno de ellos, [y] quisieron que se escribiese en el Libro para que se pasase al Señor Gobernador con estos borrones de infamia, por darle que sentir, y por burlarse del nuevo Alcalde a la vista de todo el Pueblo congregado en la Plaza según costumbre esperando la elección".<sup>5744</sup>

Aunque le hubiese constado en aquel entonces que el Regidor Don Mariano Torre no era hijo legítimo, el Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete afirmaba que

"...no hubiera podido ni debido impedir su votación para Alcalde: no habiendo Ley alguna que pida por requisito la legitimidad de nacimiento y si mas bien igualarse los hijos legítimos y los naturales para casi todos los efectos civiles, aún en lo Eclesiástico".<sup>5745</sup>

El Cabildo, según Cañete

"...no lo eligió [a Torre] para Alcalde por que era hijo legítimo, sino por haberlo reputado vecino idóneo tanto mas siendo Regidor Propietario, que solo con

serlo estaba habilitado para ser Alcalde Ordinario en virtud del privilegio auténtico que para ello tiene este Cabildo".<sup>5746</sup>

Finalmente, para Cañete, la votación de Torre para Alcalde

"...no me hubiera podido resolver a impedirla sin injusticia, aún en el caso de haber entendido el hecho; por que la falta de nobleza nativa [hidalguía] la hubiera reputado por muy bien suplida con la nobleza privilegiada que le conceden las mismas Leyes en virtud del grado honorífico que obtiene en la Milicia con Real Título de S.M.". <sup>5747</sup>

Como consecuencia de la victoria de los criterios sustentados por Cañete,<sup>5748</sup> y el consiguiente triunfo de la facción azoguera liderada por Socasa, la facción mercantil liderada por Ybieta manifestaba

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político, y público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".<sup>5749</sup>

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente [Francisco de Paula Sanz] en las asistencias y actos públicos".<sup>5750</sup>

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe [Gobernador-Intendente], y su Asesor [Cañete], viéndose los suplicantes en todo en la dura necesidad o de suscribirles, contra su propio dictamen, o de sufrir los fatales resentimientos a que hasen en el día una dolorosa experiencia".<sup>5751</sup>

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

## **Capítulo II-I-25 El nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales**

### **Índice**

- V-I Tradición historiográfica en materia de endogamia colonial
- V-II El parentesco y la distribución del agua de riego
- V-III El nepotismo y la "actividad lúdica" de los Cabildos

#### V-IV El parentesco y los crímenes que "trascendían a los parientes"

#### V-I Tradición historiográfica en materia de endogamia colonial

Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como prácticas clánicas o localistas para defender intereses parroquiales o de familia, terminó --según los estudios de Blanco Fombona (1911), André (1922), Maeztu (1934, 1942), y Felstiner (1976)-- por envolver a los clanes patricios o criollos en serias disputas con la administración colonial española, potenciadas con el sarcasmo, la ironía y la sátira.<sup>5752</sup> La crisis del orden imperial-absolutista,<sup>5753</sup> y con él el crecimiento del movimiento independentista, fue atribuido ya en ese entonces a dichas alianzas clánicas.<sup>5754</sup> Para Wolf y Hansen (1967) y para Trindade (1986), la solidaridad política entre la docena de patriciados provinciales del interior Rioplatense, que llevó a la independencia del colonialismo español, "...fue fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos políticos internos y los intereses económicos contradictorios".<sup>5755</sup> Taylor (1979, 1987), fundado en Simmel (1964), sugirió que las rebeliones ocurrieron cuando las estructuras de acomodamiento entre los que gobernaban y sus súbditos perdían su viabilidad. La pérdida de la viabilidad ocurriría cuando: 1) declinaba la legitimidad y la vitalidad del grupo dominante; 2) los grupos subordinados recuperaban el poder; y 3) los grupos subordinados ponían en actividad un poder latente.<sup>5756</sup>

Últimamente, Ross (1985, 1995) ha sostenido que el grado de conflictividad de una sociedad es función inversa de la pluralidad de fracturas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo económico, político y social (teoría de la complejidad política). Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del comportamiento del parlamentarismo absolutista --el de los Cabildos y las elites provinciales-- los vecinos del interior revelarían una intensa movilidad, una crónica inestabilidad política, y una profunda persistencia de sus pautas de conducta endogámicas y nepóticas que se prolongaron hasta fines del siglo XIX.<sup>5757</sup>

#### V-II El parentesco y la distribución del agua de riego

En Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, Francisco Montilla y Cano escribía en diciembre de 1809 al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros que desde hacía muchos años "...se gobierna este pueblo por un bando compuesto de unas mismas familias, el más pernicioso y perjudicial que se puede comprender".<sup>5758</sup> En efecto, dicha familia no era otra, según podrá observarse en el Cuadro CAT-I, que la de Francisco Acuña,<sup>5759</sup> el Comandante de Armas y Ministro Tesorero de la Real Hacienda. Acuña había elegido en 1798 como Procurador General a su consuegro Fernando Soria y Olmos,<sup>5760</sup> y este había dispuesto a su vez que su primo, José Antonio Olmos de Aguilera,<sup>5761</sup> dirigiera y mandara a Alcaldes y Regidores como si fueran de su facción. Soria cuidaba que ningún pariente quedara sin cargo concejil, al menos sin el de Síndico Procurador General, "...con el cual destruye y devora a todo este Pueblo,...complaciendo a los abarros a quienes se alla subyugado por crecidas acreencias, nacidas de sus libertinos, escandalosos, e incorregibles vicios".<sup>5762</sup> Esta parcialidad, a juicio de Montilla y Cano

"...no distingue calidades, ni escojen conductas, ni reparan en costumbres con tal que firmen y consientan en sus torpezas, lleven el régimen de que todo el Cabildo y

demás individuos sean de sus Casas, aunque no sepan hablar, y [sean] criollos, sin admitir Europeo, a quienes abominan".<sup>5763</sup>

El elemento central a tener en cuenta por quien quiera fuese el responsable del poder, era la distribución del agua de riego. Este régimen o sistema lo practicaban el Comandante de Armas Acuña y sus aliados para poder "...robar a los demás vecinos interesados el Agua de sus pertenencias, con satisfacción, y que no se oygan sus clamores, con la que laborean crecidas haciendas".<sup>5764</sup> Don Francisco de Acuña, había procurado "...en todos tiempos dominar aquel vecindario y hacer árbitro de todas las disposiciones del Cabildo, constituyendo Alcaldes y Regidores de su Casa y devoción".<sup>5765</sup> Con relación a las elecciones de 1802 se objetaban las tachas legales que tenía el Regidor electivo Félix Plá para poder votar por su co-hermano o cuñado el electo Alcalde de primer voto Don Feliciano de la Mota Botello.<sup>5766</sup> También se objetaba la elección recaída en Don Nicolás de Sosa y Soria, como Defensor de Pobres, por hallarse emparentado con el Alcalde ordinario de segundo voto Don Juan Manuel Correa,<sup>5767</sup> así como la recaída en Don Nicolás Rivera, como Mayordomo del Hospital, por estar emparentado a través de los Segura con el electo Alcalde ordinario de primer voto Manuel de Salado.<sup>5768</sup> Y con respecto a las elecciones de 1809 y 1810, los Regidores Ramón Rivera,<sup>5769</sup> y su sobrino Juan Ignacio Soria y Medrano,<sup>5770</sup> yerno de Francisco Acuña, eligieron a su hermano Manuel Soria y Medrano.<sup>5771</sup> El Regidor Juan de Bustamante, con su primo Feliciano de la Mota Botello, eligieron como Defensor General de Pobres a su pariente Joaquín de Bustamante.<sup>5772</sup> El Alcalde de Aguas sacó de Regidor en 1809 a su hijo, "...joven insolvente y sin más versación que su pública constitución de apacentar ganado en la Serranía".<sup>5773</sup> Y el Alcalde de segundo voto Capitán de Milicias Sebastián Barros y Espeche eligió en 1810 de Regidor Mayordomo del Hospital a su yerno José Ambrosio Cansinos, de Alcalde de primer voto a su cuñado Gregorio Segura, y de Alcalde de Aguas a su sobrino segundo carnal Félix Castro.<sup>5774</sup>

En una palabra, para el Dr. Antonio Domingo de Ezquerreneá,<sup>5775</sup> abogado en el recurso contra dichas elecciones capitulares, "...no hay individuo alguno de cuantos se eligieron por capitulares para 1810, que no lo haya sido al menos por dos votos de individuos enlazados con el mismo y recíprocamente por parentescos de consanguinidad dentro de grados prohibidos".<sup>5776</sup>

### **V-III El nepotismo y la "actividad lúdica" de los Cabildos**

En la composición de los Cabildos, jugaba un rol determinante el origen geográfico de los candidatos así como la cantidad de plazas vendidas al mejor postor. En Mendoza, en las elecciones de su Cabildo, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,<sup>5777</sup> y Juan Martínez de Soto y Rozas,<sup>5778</sup> el Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".<sup>5779</sup> En 1771, el Gobernador Vértiz designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.<sup>5780</sup> Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco Correas,<sup>5781</sup> el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales Reales Juan de Gamboa,<sup>5782</sup> y el Procurador General Francisco Javier Santander.<sup>5783</sup> Quince años después, en 1786, el sistema político se limitó más aún. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a sólo las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad, promoviendo automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de segundo voto en la elección

del año anterior. Otros diez años más tarde, en 1796 el Alcalde de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,<sup>5784</sup> como Alcalde de segundo voto era viciosa

"...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula se estima oy como Hacienda Real por privilegio".<sup>5785</sup>

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,<sup>5786</sup> la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaria del finado su padre, y no ser de Real Hacienda".<sup>5787</sup>

Y en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba Coronel José González,<sup>5788</sup> bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas, mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".<sup>5789</sup> Pero el Regidor Propietario Juan de la Cruz Vargas,<sup>5790</sup> temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,<sup>5791</sup> "...teniendo acción qualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",<sup>5792</sup> reclamó a fines del siglo XVIII del Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido efecto su Superior providencia".<sup>5793</sup> Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que "...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".<sup>5794</sup> En lo que hacía al Virreinato del Río de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".<sup>5795</sup>

Pero si bien los patriciados de Tucumán, Cuyo y las demás provincias, con excepción de las del Alto Perú, pudo durante la colonización hacerse "fronda", por falta de asedio desde la base social, la amenaza de la hegemonía porteña puso un triste fin a lo que Real de Azúa (1961) irónicamente denominara "actividad lúdica".<sup>5796</sup> Luego del ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, localidad de Cabeza de Tigre (donde el ex-Virrey Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha, Santiago Alexo de Allende,<sup>5797</sup> y Victorino Rodríguez,<sup>5798</sup> perdieron la vida a manos de un pelotón de fusilamiento dirigido por el Teniente Coronel Juan Ramón Balcarce), a la facción de los Funes se incorporan los integrantes del linaje de los Allende que estaban desde fines de siglo distanciados del Coronel Santiago Allende, no sólo por razones políticas sino también por intereses particulares.<sup>5799</sup> Estos eran su primo hermano José Norberto de Allende Ascasubi,<sup>5800</sup> veinte años menor que el Coronel, y los tres sobrinos segundos del mencionado Coronel, llamados Tomás Bailón y Faustino de Allende y Torres,<sup>5801</sup> y José Antonio Cabrera y Allende.<sup>5802</sup> La incorporación de Tomás Bailón viene acompañada con

una suerte de indemnización simbólica por la triste suerte corrida por su tío segundo el Coronel Santiago Allende. Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera Junta le remitió los despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que por sí sólo es una muestra del nuevo discurso político que se inaugura con la Revolución, que sanciona sólo la responsabilidad individual y elimina la aplicación de la arcaica responsabilidad colectiva. Comienzan los considerandos del despacho advirtiendo que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".<sup>5803</sup> Finalmente, el despacho justifica el proceder de la Junta refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel tío de V.S., sino el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su patria, empeñó todos sus esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la división de los pueblos, su anarquía y su ruina".<sup>5804</sup>

La integración de los Allende de filiación patriota es lograda, sin embargo, no sin fuertes resistencias, pues en Julio de 1811 el Dr. Manuel Félix de Tejada y Fernández de Loria,<sup>5805</sup> Antonio Arredondo, Dalmacio Allende Moyano,<sup>5806</sup> y Silvestre Martínez cuestionaron que se hubiera propuesto a hombres asociados a la Casa de los Allendes, "...como sino hubiesen más vecinos que los de este apellido". José Norberto de Allende Ascasubi era primo hermano de la mujer de Ambrosio Funes y tío segundo carnal tanto de Tomás y Faustino Allende como de José Antonio Cabrera (es decir en el quinto grado de parentesco), y estos últimos eran entre sí primos hermanos.<sup>5807</sup> También se sumaron al nuevo bloque de poder José Manuel de Isasa,<sup>5808</sup> Eduardo Pérez Bulnes,<sup>5809</sup> Juan Pablo Pérez Bulnes,<sup>5810</sup> Gaspar del Corro,<sup>5811</sup> el Presbítero Miguel Calixto del Corro,<sup>5812</sup> Lorenzo y Narciso Moyano Peralta,<sup>5813</sup> y José y Benito Lascano.<sup>5814</sup> Del grupo mencionado sólo dos de ellos alcanzaron en el pasado cierta notoriedad como comerciantes: Lorenzo Recalde y Cano,<sup>5815</sup> y Miguel del Corro.<sup>5816</sup>

#### **V-IV El parentesco y los crímenes que "trascendían a los parientes"**

Del creciente proceso de descomposición de los linajes encomendiles y de las casas patricias del interior del espacio colonial era factible que sus descendientes varones, aquellos que carecían de la posibilidad de concertar un matrimonio conveniente o de acceder al Cabildo, recayeran en lo que Halperín Donghi (1979) denunciaba como una ruralización o barbarización de la elite.<sup>5817</sup> En el caso preciso de Córdoba, la erosión de la encomienda había traído por consecuencia una crisis muy profunda en la composición de su elite. La elite nativa cordobesa --que había logrado fusionar sus intereses mediante el matrimonio concertado entre Francisco de Armesto y Allende con la hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay y Molina Navarrete-- sufrió en 1782 una tremenda convulsión. En efecto, el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fue hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la joven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual.<sup>5818</sup> Las circunstancias que rodeaban la personalidad de Garay, los respetos debidos a su

empleo, las conexiones de su casa, que incluían al linaje de los Allende, formaban, al decir del Canónigo Gregorio Funes en carta al Virrey, "...un conjunto de cosas temibles a mi hermano, si su Dios y su Rey no fuese la única cosa que él teme".<sup>5819</sup> No eran infundados sus temores, pues apenas se verificó la prisión de Garay

"...empezó en esta Ciudad un murmullo de toda su parentela, que nos llenó de confusión. Ellos nos han difamado públicamente con la nota de mulatos, y con cuantas calumnias puede inspirar una torpe venganza".<sup>5820</sup>

Si bien dicha prisión no duró demasiado la inconducta reincidente de Garay confirmó al vecindario de la justa actitud del Juez Ambrosio Funes. En 1790 Garay fue nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres.<sup>5821</sup> Con motivo de este proceso se le embargan los bienes.<sup>5822</sup> Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas.<sup>5823</sup> En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay,<sup>5824</sup> y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires.<sup>5825</sup> La destacada actuación de Funes en dicho juicio, donde demostró poseer una inusual independencia de carácter, le sirvió para diferenciarse del bloque de los Allende, de cuyas filas había partido su designación como Alcalde de Segundo Voto, e inaugurar una nueva facción que con el correr de los años se convirtió en un bloque de poder de neto corte anti-allendista.

En el incumplimiento de las promesas de esponsales es donde más se ve la impotencia de las elites rurales bastardeadas para acceder a la elite urbana central. En una carta que el Rector de la Universidad de Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan,<sup>5826</sup> dirigiera el 16 de noviembre de 1800 a su amigo y ex-discípulo el Dr. Juan José Castelli,<sup>5827</sup> lo provee de información genealógica acerca del mestizaje sufrido por la familia de los Tejeda. Esta información la necesitaba Castelli para que, fundado en la falta de consentimiento familiar,<sup>5828</sup> refutara la demanda que por incumplimiento de promesas de esponsales iniciara en 1798 María Victoria Pereyra y Mariño, hija del Administrador Principal de la Villa de Luján Antonio Pereyra y Mariño, y de la cordobesa Teresa Bruno y Tejeda, contra el Teniente Juan Ramón Balcarce.<sup>5829</sup>

La implantación de la Real Ordenanza de Intendentes, que erigió a la ciudad de Córdoba en cabecera de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, si bien amplió su espacio jurisdiccional, disminuyó la soberanía relativa de su propio Cabildo.<sup>5830</sup> Asimismo, la erección del Real Consulado de Buenos Aires, con sus Diputados en cada ciudad cabecera del interior del espacio colonial, también había disminuído la soberanía relativa del Cabildo cordobés.

Pero la crisis provocada a comienzos del siglo XIX en el comercio exterior, y en la producción minera, y por consiguiente en el mercado interno colonial, y en la cadena del crédito comercial, y la consabida crisis fiscal que se desató en todas las provincias correspondientes al Virreinato del Río de la Plata, necesariamente provocó fisuras y rivalidades entre las solidaridades familiares, como las que en este trabajo hemos comprobado, que con posterioridad la revolución y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos. Pese a la llamada Organización Nacional,

durante la segunda mitad del siglo XIX, y a la expansión económica de la década del 80, las elites regionales no se nacionalizaron. Los casos de alianzas matrimoniales de corte interprovincial, constituyen la excepción que no confirma la existencia de una mal llamada oligarquía argentina.<sup>5831</sup>

## **Capítulo II-I-26      Cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense.**

### **Índice**

W-I    Peculiaridad del nepotismo militar.

W-II   El caso de La Rioja.

### **Introducción del capítulo II-I-26**

Existió a lo largo y ancho de toda la América Española, un generalizado nepotismo militar. Este fenómeno fué comprobado por Sánchez de Tagle (1982) en México,<sup>5832</sup> al final de las reformas Borbónicas; y por Halperín Donghi (1979) en el Río de la Plata, en los prolegómenos de la Revolución.<sup>5833</sup> A su vez, Mayo (1987) comprobó que en la campaña de Buenos Aires los oficiales de las Milicias rurales gozaban de una fuerte solidaridad interna provocada por sólidos lazos de parentesco.<sup>5834</sup> En Buenos Aires, los Coroneles Juan Ignacio de Elía,<sup>5835</sup> Manuel Antonio Warnes y José María Calceite fueron concuñados entre sí, y cuñados del Comandante del Batallón de Milicias Juan Francisco García de Zúñiga,<sup>5836</sup> poderoso terrateniente en ambas bandas del río Uruguay.<sup>5837</sup> Asimismo, el Comandante del Regimiento Fijo de Buenos Aires Juan de Salas era concuñado del Capitán de Infantería y Subteniente del Real Cuerpo de Artillería Martín Cevader, y del Cadete de Blandengues Miguel García.<sup>5838</sup> En Montevideo, Mariluz Urquijo (1987) constató cómo el Comandante García de Zúñiga, pidió infructuosamente que su hijo Victorio fuera designado Capitán de la nueva unidad, a cambio de la donación de un par de banderas para el Batallón.<sup>5839</sup> En el Alto Perú, más precisamente en Tarija, el Coronel de Milicias Luis Hurtado de Mendoza había incurrido en nepotismos pues, "...no ha arreglado las compañías, de forma que a parientes suyos inútiles, ha hecho capitanes".<sup>5840</sup> Aparte de la milicia, también se extendió el nepotismo a las estructuras del ejército.<sup>5841</sup> Pero una cosa era el nepotismo vigente en los Reales Ejércitos y otro muy distinto el vigente en las Milicias.

### **W-I    La peculiaridad del nepotismo militar.**

Amén de la relación entre padres e hijos, y entre hermanos y primos hermanos, la peculiaridad del nepotismo militar vigente en los Reales Ejércitos, a diferencia del vigente en la Milicia, es que se daba primordialmente entre suegros y yernos, como una suerte de dote, a falta de la congrua sustentación.<sup>5842</sup> La Tabla K-I nos ilustra acerca de los ocho casos más resonantes en que la relación de nepotismo se dio entre suegros y yernos. No obstante la primacía de los casos entre suegro y yerno también se dieron numerosos casos en que la relación predominante fue entre padres e hijos, entre cuñados, y entre concuñados. El Brigadier de los Reales Ejércitos Agustín Fernando de Pinedo,<sup>5843</sup> fue padre del Coronel de Ejército Agustín José de Pinedo.<sup>5844</sup> El General Antonio de

Larrazábal,<sup>5845</sup> fue padre del Coronel de Ejército Marcos José de Larrazábal.<sup>5846</sup> El Cnel. Marcos José de Larrazábal era cuñado del Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Buenos Aires Manuel de la Quintana, del Sargento Mayor del Regimiento de Dragones José Ignacio de la Quintana, del Comandante de las Compañías de Blandengues de la Frontera Nicolás de la Quintana, y del Alférez de Dragones Xavier de la Quintana; y concuñado del Teniente Coronel de Artillería Juan Antonio Marín de Cáceres,<sup>5847</sup> y del Comandante Domingo Alonso de Lajarota.<sup>5848</sup> El Coronel Pedro de Arce,<sup>5849</sup> era concuñado del Teniente Coronel Ramón de los Reyes.<sup>5850</sup> El Coronel Juan Gregorio de Otálora fue padre del Coronel José Antonio de Otálora. El Coronel Lázaro de Ribera,<sup>5851</sup> era concuñado del Brigadier Santiago de Liniers y del Teniente Coronel Ángel Augusto de Monasterio. El Capitán José Martínez Fontes,<sup>5852</sup> fue padre del Teniente del Regimiento de Dragones José Gaspar Martínez Fontes, del Comandante de la Guardia de Rojas Teniente Coronel de Caballería del Regimiento de Blandengues Manuel Martínez Fontes, y del Contador de la Real Renta de Tabaco del Paraguay Vicente Martínez Fontes; y suegro del Comandante de la Guardia de Luján Francisco González Balcarce,<sup>5853</sup> y de Juan Ignacio Rodríguez Peña.<sup>5854</sup> A su vez este parentesco se hallaba reforzado pues las hermanas de este último estaban casadas con los Coroneles Antonio de Olavarría y José Antonio de Zavala y Delgadillo.<sup>5855</sup>

En cuanto al nepotismo vigente en las Milicias, en Corrientes, en 1758, con la retirada del Teniente Gobernador Nicolás Patrón y Centellas,<sup>5856</sup> los vecinos esperaban mayores disgustos, porque se había publicado que habría de asumir el mando el concuñado de Patrón, Don Ziprián de Lagraña,<sup>5857</sup> "...que hasta ahora no ha hecho una sentinela, y le hacen creer a estos pobres por decir que lo conseguirán con su plata, que con ella harán lo que quisieren".<sup>5858</sup> El segundo inconveniente mencionado por el Gobernador del Paraguay Joaquín Alós y Brú consistía en que ciñéndose el Gobernador a los candidatos elevados por el Cabildo en las Propuestas, no le quedaba a aquel arbitrio alguno, "...y muchos beneméritos que deben ser premiados, quedarán postergados sin premio".<sup>5859</sup> Y el tercer inconveniente, que siendo la mayoría de los cabildantes Europeos, "...han de inclinarse a los Paisanos, posponiendo a los Provincianos".<sup>5860</sup> En la Gobernación Militar de Misiones, el Regidor Francisco Xavier de Casajús,<sup>5861</sup> llegó a revelar que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste último lo trató a Don Carlos José de Añasco, Gobernador Militar Interino de Misiones,<sup>5862</sup> de mulato. Más aún, cuando su antecesor en la Gobernación, el Teniente Coronel de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,<sup>5863</sup> por no conformar al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, fué reemplazado en 1769 por Añasco, Casajús nos cuenta que Riba Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar cuenta al Rey por haberle hecho suceder en dicho ministerio a un mulato".<sup>5864</sup>

Asimismo, los oficiales de Milicias de Asunción, la mayoría vecinos miembros del Cabildo, debieron lidiar con los Gobernadores-Intendentes y sus Tenientes Asesores Letrados.<sup>5865</sup> Por un lado, como Oficiales Milicianos, los vecinos de Asunción gozaban del fuero militar y como tales estaban exentos de la jurisdicción ordinaria de la justicia capitular. Los Jefes, Oficiales y Soldados de los Regimientos de Campaña y de las Compañías de las Villas de Curuguatí, Rica, Concepción, Remolinos y Neembucú, estaban exentos de la jurisdicción ordinaria del Cabildo de Asunción.<sup>5866</sup> No obstante sus privilegios, los Jefes de los tres Regimientos de Caballería de Campaña José Antonio Yegros,<sup>5867</sup> Salvador Cabañas y Ampuero,<sup>5868</sup> y José Espínola y Peña,<sup>5869</sup> estaban profundamente divididos por sus aspiraciones a la plaza de Maestre de Campo General.<sup>5870</sup> Por el otro lado, como encomenderos, los vecinos de Asunción se habían repartido la

mayor parte de las tierras cultivables. La región del Quayyó e Itauguá era del dominio de los Yegros, la de las Cordilleras de los Cabañas y Ampuero, la de Paraguari y Carapeguá de los Bareiro, la de Pilar de Ñeembucú de los Rojas de Aranda, la de Tapúa de los Casal y Sanabria, la de Concepción de los Espínola y Peña, y la de Ycuamandyjú de los Lacoizqueta.<sup>5871</sup> Por ello es que cuando se instauró la Real Ordenanza de Intendentes, en 1784, las nuevas autoridades se encontraron con un frente casi inexpugnable. El Gobernador Agustín Fernando de Pinedo,<sup>5872</sup> en 1776, y el que luego fuera el Teniente Asesor Letrado Lorenzo Grambel, en 1787, tuvieron que defenderse de numerosos cargos que les fueron imputados. En el caso particular de Pinedo, las acusaciones habrían obedecido a su reiterado afán de abolir las encomiendas,<sup>5873</sup> y en el de Grambel, a su interés en liquidar el fuero militar, que perjudicaba la entonces embrionaria libertad de comercio.<sup>5874</sup>

## **W-II El caso de La Rioja.**

En La Rioja, el poeta mestizo Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán, hijo adulterino de un miembro del patriciado riojana, alcanzó no sin tropiezos desde 1759 grados militares en la milicia Riojana, y luego en 1786, el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo.<sup>5875</sup> El noble bastardo fue educado por su padre como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía las causas perdidas de las castas postergadas.<sup>5876</sup> Su padre se había casado en 1722 con Mariana Bazán de Pedraza, heredera del Mayorazgo de Tótox, hija de un riojano que fuera Gobernador del Paraguay, el Maestre de Campo Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda Guzmán. Habiéndose casado su padre en segundas nupcias con Francisca de Lezama, esta última cuando en 1783 o 1784 enviuda, designa como albacea de su marido al hijo bastardo, por quien seguramente el padre guardaba predilección, provocando con ello la indignación de algunos de sus medios hermanos legítimos, que finalmente lo impugnan "...por notoriamente infame, por espurio, desterrado, tumultuario, y revoltoso".<sup>5877</sup> Digo algunos, porque en 1783 el mayor de todos, Andrés Nicolás, le otorgó el poder para testar, y un año después de fallecido el mismo, el apoderado y noble bastardo Ocampo Ysfrán otorga el testamento previniendo a los herederos del Mayorazgo de Tótox, contra sus propios principios igualitarios pero fiel a los dictados de su poderdante, que

"...siempre que por casamiento desigual degeneraren, ...pierdan el vínculo como transgresores de aquella primera intención y pase el goce al que de la misma línea llevase el lustre de la familia".<sup>5878</sup>

Pareciera ser que el estigma de la forma ilegítima en que fue concebido lo persiguió a Ocampo Ysfrán de por vida, pues en 1786, al ser electo a los 62 años de edad Alcalde Ordinario de La Rioja, el Subdelegado de Real Hacienda Capitán Juan Antonio Gómez,<sup>5879</sup> lo impugnó en virtud de su origen bastardo. Como Ocampo estaba vacunado contra estas adversidades no se enojó ni retó a duelo al insolente peninsular sino que consecuente con su espíritu libertario compuso unas famosas décimas que llegaron hasta los propios despachos del Gobernador-Intendente de Córdoba, bajo el título de Décimas Correctivas.<sup>5880</sup>

Aparentemente, Ocampo Ysfrán sentó jurisprudencia, y su lucha no fue en vano, pues ante casos parecidos su opinión habría sido consultada, al extremo de ayudar en la defensa de quienes se encontraban en situaciones de marginamiento.

## Capítulo II-I-27

### **Acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial**

#### Índice

- X-I Índice de endogamia.
- X-II Clero secular del interior.
- X-III Reclutamiento y promoción dentro del clero regular.
- X-IV Casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.
- X-V Ordenes Terceras o Terciarias.

#### **Introducción del capítulo II-I-27**

A lo largo y ancho de toda la América Española amén del clericalismo existió al parecer un generalizado nepotismo eclesiástico.<sup>5881</sup> Este fenómeno fue comprobado por Guibovich Pérez (1994) en el Perú de fines de las reformas Borbónicas.<sup>5882</sup> En el Río de la Plata en particular, el nepotismo vigente en el clero secular, si bien no podía apartarse de la norma general que se daba en todas las instituciones del Antiguo Régimen, se distinguió del vigente en la milicia y la burocracia civil.

#### **X-I El índice de endogamia.**

La designación de los integrantes de los Cabildos Eclesiásticos, al igual que en los Cabildos seculares, estaba afectada por fuertes lazos de solidaridad interna, provocada a su vez por sólidos vínculos de parentesco. De resultas de la incorporación de los hijos del patriciado al clero secular, el clero de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Juan habría generado en su seno un alto índice de parentescos mutuos. Estos vínculos eran combatidos por la institución de la alternativa,<sup>5883</sup> y por las disposiciones contenidas en la legislación vigente,<sup>5884</sup> que establecían que dos hermanos no podían ser canónigos al mismo tiempo, y que si hubiere un capitular que tuviese parentesco hasta el cuarto grado con algunos de los concursantes en las oposiciones convocadas debía abstenerse de votar.<sup>5885</sup> Tan era así, que cuando en 1804 el Deán de Córdoba Gregorio Funes presentó una terna para cubrir la sede vacante de la Sacristía Catedralicia de Córdoba, al incluir en la misma a su sobrino carnal José Felipe Funes, y eliminar de la nómina al Dr. Pedro Vicente Ferreira, Cura y Vicario de la Primera Sierra y Anejos de Córdoba, el sobrino de este último, el Chantre Juan Justo Rodríguez,<sup>5886</sup> puso el grito en el cielo. Finalmente, prevaleció la voluntad del Chantre Rodríguez, cuya madre era prima en cuarto grado del Dr. Ferreira, pues el Virrey Sobremonte, amigo del Chantre, eligió a este último, haciendo a un lado la terna elevada por el Deán de Córdoba Gregorio Funes.<sup>5887</sup>

De la nómina de clérigos seculares beneficiados por capellanías otorgadas en Buenos Aires, muchos resultaron mutuamente parientes, dando lugar así a una endogamia clerical que se manifestaba como una suerte de nepotismo. La Tabla J-I revela 27 casos de curas y frailes que, en Buenos Aires, resultaron hermanos entre sí. Y la Tabla J-II revela

una decena de casos donde las relaciones de parentesco era entre curas primos hermanos. Avellá Cháfer (1983) registró dos casos entre hermanastros, los cuales se dieron en el siglo XVII entre el Cura de la Catedral Juan de Oramas Filiano y el Pbro. Diego de Rosendo y Trigueros, y en el siglo XVIII entre el Cura José Antonio Gutiérrez y Castellanos y el Canónigo Juan José Fernández de Córdoba.<sup>5888</sup> Pero la peculiaridad del nepotismo clerical consistía --al igual que en la antigua Roma papal, pero a diferencia del nepotismo militar-- en darse sólo entre tíos y sobrinos.<sup>5889</sup> La Tabla J-III nos ofrece una treintena de los casos más resonantes de nepotismos clericales ocurridos en Buenos Aires entre tíos, sobrinos y sobrinos-nietos a lo largo de los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX.

El más paradigmático de todos fue sin duda el de los sobrinos y sobrinos-nietos del Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa. Este Doctor fue Arcediano de la Catedral de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo dotado con su fortuna personal y el albaceazgo de sus adinerados parientes una docena de capellanías, algunas a favor de sus sobrinos y sobrinos nietos carnales. Fue tío del Dr. Francisco de Cossio Terán y Figueroa, de Fr. Pedro Pascual Sebicos y Rodríguez de Figueroa, del Dr. Juan Jacinto González de Cossio, y de Sor Teresa de Sebicos; y tío abuelo de los Presbíteros Basilio Millán y Rodríguez de Figueroa, Pablo Pantaleón Romero y Rodríguez de Figueroa, Vicente Arroyo y González de Cossio, José Antonio de Oro y Cossio Terán, y Miguel A. Escudero y Cossio Terán, y del R.P. Pedro Nolasco Stefani y Millán.<sup>5890</sup> En una de sus fundaciones, el Arcediano Rodríguez de Figueroa se nombró a sí mismo por Patrono de una Capellanía de \$1.500, estableciendo que para después de sus días nombraba por Patrono a su hermano Domingo Rodríguez de Figueroa; designando para Capellán al Dr. Francisco de Cosio y Therán, y dejando como condición expresa que "...ordenándose de sacerdote mi sobrino Juan Jacinto de Cossio la ha de servir dicha Capellanía", pero "...estando en estado de ordenes sacros los hijos de Doña Ana Margarita de Cosio y Therán [mujer del Tte. Francisco Escudero] gocen el beneficio de antelación en esta capellanía a los demás parientes".<sup>5891</sup> A su vez, el Dr. Francisco Cossio Terán y Figueroa era tío carnal de los Doctores Miguel A. Escudero y José Antonio de Oro;<sup>5892</sup> el Dr. José Antonio de Oro era tío del Dr. Bernardo de la Colina y Oro;<sup>5893</sup> y el Dr. Vicente Arroyo tío del Lic. José Denis y Giles Cossio Terán.<sup>5894</sup> Cabe destacar, que el caso opuesto al del Arcediano Rodríguez de Figueroa fue el del Canónigo Juan Baltasar Maciel,<sup>5895</sup> quien en su carácter de albacea de la poderosa hacendada María Josefa Bazurco y Herrera,<sup>5896</sup> dotó media docena de capellanías a favor de sacerdotes que no tuvieron relación de parentesco alguna con su persona. Las relaciones de parentesco también eran manipuladas por las autoridades de las órdenes religiosas a los efectos de mejorar su posición relativa en el mercado del crédito eclesiástico. Cuando el Cap. Juan Ignacio de Elía pidió a censo \$325 a la Orden Dominica, el Prior le contestó que sólo accedería si tomaba igualmente a censo \$746 de los bienes concursados de su cuñado, el finado terciario dominico Pedro Mártir García de Zúñiga, en cuyo concurso de acreedores le fue dada a la Orden el último lugar.<sup>5897</sup>

## **X-II El clero secular del interior.**

También en el clero secular del interior se registró un intenso nepotismo. Efectivamente, lo que hemos podido observar en los libros de Capellanías del Arzobispado de Córdoba y en fuentes secundarias es lo mismo que hemos observado en Buenos Aires, una estrecha relación de parentesco entre algunos eclesiásticos fundadores de capellanías y sus beneficiarios. En Córdoba, el Maestro Bernardo de Reyna Vera fundó en 1699 la Capellanía de Sinsacate a favor de su nieto el Lic. Fernando de Herrera y Velazco,<sup>5898</sup> y el Pbro. Dr. José Antonio Moyano Cabrera fundó en 1784 una capellanía denominada de

Santa Gertrudis, de \$1.000, sobre unas casas en la ciudad de Córdoba, a favor de su sobrino carnal el Pbro. Leopoldo de Allende Moyano,<sup>5899</sup> y el Chantre de la Catedral y ex-Rector del Seminario, Maestro Antonio Suárez de Cabrera, fundó dos capellanías legas, la una para su sobrino-nieto Domingo Coarazas, que a su fallecimiento recayó en su hermano Juan Gualberto Coarazas, y la otra para Juan Gualberto mismo, Rector del Colegio de Loreto, que finalmente legó a los herederos de su primo Antonio de la Quintana y Sebreros.<sup>5900</sup>

En La Rioja, el Pbro. Miguel del Moral, quien fuera Arcediano de la Catedral de Córdoba, funda en 1803 una capellanía a favor de su sobrino carnal el Mro. Julián Carmona;<sup>5901</sup> y en 1812 el Pbro. Domingo Dávila y Mercado funda una capellanía a favor del Pbro. José Andrés del Moral y Dávila.<sup>5902</sup> Y en San Juan, Francisco Fernández de Maradona,<sup>5903</sup> y José Ortiz de Santibáñez solicitaron en 1782 para sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Ángel Ortiz la capellanía de Santa Bárbara, fundada en 1753 por Don Juan Calzada Álvarez de Miranda y su esposa Bernardina Toranzos y Montenegro,<sup>5904</sup> vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias y Jofré, alegando ser sus hijos respectivamente sobrino y sobrino nieto de los instituyentes de la capellanía, Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda, quienes la habían fundado en 1753.<sup>5905</sup> Por ende, el clero secular sanjuanino quedó dominado por clanes patricios. El Pbro. José Manuel Lima y Cano de Carbajal, heredero de la capellanía fundada en 1785 por Francisco Lima,<sup>5906</sup> era tío del Pbro. José Manuel Videla Lima.<sup>5907</sup> Y el R.P. Gabriel José Ignacio de Guardiola y Navarro era tío del Pbro. Pedro Pablo Rufino y Guardiola.<sup>5908</sup> Asimismo, la familia Hurtado estaba profundamente extendida en el clero Sanjuanino. María Ignacia Hurtado, mujer del peninsular Juan de Castro, era madre del Pbro. José María Castro Hurtado.<sup>5909</sup> María Antonia Hurtado, mujer de Domingo Flores, era madre de Fr. Manuel Flores Hurtado O.P.<sup>5910</sup> Y María Teresa Hurtado, mujer de José Videla y Morales de Albornóz, era madre de Fr. Blas Videla O.P., Lector en San Juan.<sup>5911</sup>

### **X-III El reclutamiento y promoción dentro del clero regular.**

El reclutamiento y promoción dentro del clero regular estaba también fuertemente condicionado por el monto y cantidad de las capellanías en juego y la extracción familiar de los miembros de las respectivas ordenes religiosas. En Cuyo, las ordenes religiosas estaban dominados por clanes patricios estrechamente vinculados a la vitivinicultura y a la exportación de caldos al Alto Perú y el Litoral. Es preciso recordar, que para este comercio a larga distancia, los miembros del clero solían estar exentos del pago de la sisa.<sup>5912</sup> En San Juan, por ejemplo, Don Pedro Toranzos y Montenegro solicitó para su nieto Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P. la misma capellanía de Santa Bárbara citada anteriormente.<sup>5913</sup> En cuanto a la composición familiar, la Orden de San Agustín estaba compuesta mayoritariamente por el clan familiar de los Mallea, y la Orden Dominica por el clan de los Albarracín. Los frailes Miguel Albarracín Balmaceda, O.P. y José Justo Albarracín Domínguez O.P. eran tíos carnales de Fr. José Francisco Albarracín Irrazábal y del R.P. Anselmo Remigio Albarracín Irrazábal, y tíos abuelos de Fr. Juan Pascual Albarracín y Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín.<sup>5914</sup>

### **X-IV Los casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.**

Amén de los casos de nepotismo, al alto clero lo abrumaban los casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía. Como en la América hispana de mediados del siglo

XVIII --debido a la escasez de clérigos-- los exámenes de Limpieza de Sangre habían perdido rigor, la corona debió idear dispensas o excusas legales para obviar los casos de ilegitimidad, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos.<sup>5915</sup> Más aún, el papado mismo había autorizado ya en el siglo XVI la dispensa o eximición de la legitimidad a los curas mestizos.<sup>5916</sup> Por el proceso de Limpieza de Sangre cualquier aspirante a cura podía 'aclararse' legalmente, es decir, cambiar una línea de sangre o status racial por otra.<sup>5917</sup> Mientras hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se podía atrever a desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.<sup>5918</sup>

En un padrón compuesto en 1777, de un centenar y medio de eclesiásticos seculares de Tucumán, publicado por Larrouy (1927), el Obispo del Tucumán Juan Manuel Moscoso declaró que del Deán Don Antonio González Pabón "...no consta la legitimidad del nacimiento", y que de Pedro de Arias, Francisco Sánchez Bernaldel y José Rosa de Córdoba constaba eran hijos naturales, el primero "hijo de padres nobles" y el último "...de genio inquieto y sedicioso y por apagar el incendio que promovió en Córdoba le destiné de Teniente Cura en la Doctrina de Río Cuarto".<sup>5919</sup> El Mro. Gabriel de Bracamonte, por ser hijo ilegítimo, necesitó en 1752, en Córdoba, para alcanzar las ordenes de Epístola, de una dispensación especial, consistente de una "información bastante de ser tal expósito". Si bien por ser expósito Bracamonte no podía requerir Información de Limpieza de Sangre, si de las declaraciones de los testigos examinados en su Información de orfandad "...resultare noticia de quienes son o fueren sus padres, sean o no de matrimonio o fuera de él, recibiréis información de la limpieza de los dichos sus Padres y abuelos paternos y maternos".<sup>5920</sup> En Buenos Aires, la prueba de que los Exámenes de Limpieza de Sangre eran relativos, lo ofrece el Gobernador Andonaegui, en el caso del Arcediano Juan Antonio Espinosa, del cual advirtió en 1755 "...alguna nota de menos limpieza en sus Progenitores".<sup>5921</sup> Cuando con motivo de proveerse el Curato de la Catedral de Córdoba con Fr. José Ignacio de Mendiola, y luego de haber enrostrado el Dr. José Ignacio Ascasubi al Dr. Bernabé Echenique el suicidio de su padre, este último estigmatizó al Dr. Ascasubi como "descendiente de mulata por línea materna".<sup>5922</sup> Y cuando en 1809, el Obispo Nicolás Videla del Pino, de origen cuyano, dirige un oficio al Virrey del Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros impugnando la autoridad del Deán y Canónigo Dr. José Miguel de Castro,<sup>5923</sup> para objetar su propio modo de actuar, aduce que este último era "...de una extracción oscurísima, siendo aquí público ser nieto de un mulato zapatero".<sup>5924</sup>

## **X-V El caso de las Órdenes Terceras o Terciarias.**

También las Ordenes Terceras o Terciarias estaban dominadas por clanes familiares. En Buenos Aires, a excepción de los Terciarios Betlemitas donde predominaban los peninsulares,<sup>5925</sup> la Tercera Orden de San Francisco se destacó por ser la primera en incorporar a comienzos del siglo XVIII a sectores del patriciado porteño. La Tabla J-IV enumera alfabéticamente el centenar de miembros que integraron sus filas.<sup>5926</sup> Muchos de entre ellos también integraron verdaderos clanes familiares. Las familias de los Cabrera y Bracamonte, Cruz, Fuente y Zaballos, García Ortiz y de la Rosa, Leiva y Roca Vergara, Navarro de Velazco, Ponce y Melo, y Ruiz Sancho de Bolaños pertenecieron a dicha Orden Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas Ordenes religiosas. El matrimonio de Francisco Fernández de la Bárcena y Agustina Ruiz de Hinostroza contó con tres hijos frailes.<sup>5927</sup> Paula de Gaete y Bazán de Tejada, viuda de Juan José de la Palma Lobatón, tuvo dos hijos curas y cuatro

hijas monjas.<sup>5928</sup> María Martínez de Aberastury y San Martín, viuda de Juan Rodríguez Peñalva y de Nicolás Barragán contó con dos hermanos frailes.<sup>5929</sup> Sebastiana Zenarra y Esparza contó en su haber con dos hermanos frailes.<sup>5930</sup> Y el matrimonio de Juan Francisco Churruca e Isabel de Rocha Colares contó con dos hijos frailes.<sup>5931</sup>

La Tabla J-V nos brinda la nómina de los frailes franciscanos identificados en la obra de Fernández Burzaco. Posteriormente, a fines del siglo XVIII, la Tercera Orden de Santo Domingo desplazó de la hegemonía Terciaria a la Orden de San Francisco. En la orden Dominica el peso de la inmigración peninsular fue llamativo. La Tabla J-VI enumera alfabéticamente los 407 miembros que integraron a fines del siglo XVIII las filas Terciarias de la Orden Predicadora, de los cuales 196 eran de origen porteño, y 64 de origen peninsular (26 de Galicia, 7 de Asturias, 8 de Castilla, 11 de Andalucía, 8 de Cataluña, y 4 de Santander). Si consideramos la localidad de origen de los padres de los Terciarios nacidos en Buenos Aires, la importancia de los Hermanos Terciarios de origen peninsular aumentaba considerablemente. De los 196 Terciarios Dominicos de origen porteño, 12 provenían de Galicia, 6 de Portugal, 4 de Lugo, 3 de Sevilla y Valencia respectivamente, 2 de Guipúzcoa y 1 de Mallorca, Piamonte, Madrid, Bilbao, Burgos, Castilla, Aragón, Ecija, Génova, Pamplona y Andalucía, respectivamente. Muchos de entre ellos integraban verdaderos clanes familiares. María Teresa Barragán y Rodríguez de la Torre, mujer de Plácido Antonio Gallardo, fue Hermana Terciaria de Santo Domingo, así como su hija Francisca de Paula Gallardo, mujer de Gabriel Antonio de Castro.<sup>5932</sup> Gregorio Aráoz y su yerno el Cnel. Andrés Parra, y las familias Barceló, Cabrera Bracamonte, Castrelos y Sotuyo, Correa Lazcano, Duarte Serrano, González de Sosa y Almeyda, Guerra, Hidalgo, Mosqueira y Díaz, Olivera Sotomayor, Parodi y Dulce, Pequeño y González de Salas, Pizarro, Porra, Portela, Sendez, y Veloso pertenecieron a dicha Orden Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas Ordenes religiosas. Los tres hijos varones del matrimonio celebrado en 1760 entre el Capitán Pedro Giménez de Paz y la cordobesa Isabel de Acosta Espinosa fueron frailes Dominicos.<sup>5933</sup> Las dos hermanas de José Julián Guerra resultaron ser monjas, una capuchina y la otra catalina.<sup>5934</sup> La Tabla J-VII nos brinda la nómina de 40 frailes Dominicos identificados en la obra de Fernández Burzaco. Entre las demás ordenes religiosas también se dieron casos donde estaban presentes ciertos clanes familiares. Pero a diferencia de la Compañía de Jesús, en la Orden Mercedaria y su Cofradía, la del Rosario, se presentaba una pronunciada endogamia de familias patricias venidas a menos. En aquellos tiempos, el hijo de una familia patricia con vocación religiosa, pero que no tenía congrua para ingresar al clero secular, por lo general ingresaba al clero regular.<sup>5935</sup> La Tabla J-VIII revela la nómina de 14 padres Jesuitas y la Tabla J-IX la de medio centenar de frailes Mercedarios.

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el Clero de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en esta institución, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

## **Epilogo Sección II-I**

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado proceso de acortesanamiento y nepotismo comprobado en el clero, la milicia y la burocracia de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en estas

instituciones, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

## **Sección II-J**

### **Capítulo- II-J-28**

### **Conclusión del Tomo-II**

Las crisis espiritual provocada a fines del siglo XVIII con la expulsión de los Jesuitas y la crisis económica causada a comienzos del siglo XIX con la debacle en el comercio de ultramar y en la producción minera, pecuaria y agraria (tabaco y yerba), y por consiguiente en el mercado interno colonial y en la cadena del crédito comercial, y la consabida crisis fiscal que se desató en todas las gobernaciones y provincias correspondientes al Virreinato del Río de la Plata, necesariamente provocaron fisuras y rivalidades entre las solidaridades familiares, como las que el colapso del orden imperial-absolutista y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos.

Podemos afirmar entonces, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII en este tomo relatadas, que la causa eficiente de dichas fisuras fue por lo general el cerrado comunismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas y el colapso del orden imperial, pues lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente. Asimismo, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda estratificación en la distribución de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de la sociedad colonial. La discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras discriminaciones gobernadas por la pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino desde una sociedad estamental hacia una sociedad de clases.

Podemos concluir, sobre la base de los incontables conflictos suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la manipulación del fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo se interfirió mediante el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también se irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la denominada Revolución de Mayo apenas logró disipar.

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión,

revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellánico, se transmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia de la modernidad absolutista; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsa practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el género primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

Asimismo, del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos Aires y el interior, surge en forma prístina una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que las relaciones etnológicas arriba mencionadas, manipuladas por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la Revolución de Independencia.

Con relación a la fragmentación gremial de la corporación mercantil, no cabe duda que el impacto de las guerras provocadas por la revolución francesa incidieron en la conformación de un atisbo de emergencia de una clase mercantil autónoma de las casas monopolistas de Cádiz. En cuanto a la descomposición social del régimen esclavista, la docilidad del esclavo Rioplatense, alegada por quienes quisieron desestimar la existencia de una crisis en el orden esclavista vigente, este mito se derrumbó con la corroboración de las frecuentes fugas de esclavos urbanos; la reincidencia del esclavo en la fuga; la prolongación de la fuga en el tiempo; la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; las crónicas y cíclicas crisis comerciales que fomentaban la fuga esclava; el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; el rol clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; del uso del aparato represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos. La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas,

económicas, políticas y sociales. Las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles.

Sumada a la crisis del orden estamental y esclavista, podemos agregar la existencia de una crisis en la esfera productiva minera. A comienzos del siglo XIX, cuando estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue y mano de obra. Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese tiempo, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.<sup>5936</sup>

De igual modo, a la crisis minera, también se debe añadir la gestación de una profunda crisis agraria. La importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos nos permitió descubrir sus efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;<sup>5937</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>5938</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los campos”, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un desorden o metanastasis en todo el litoral Rioplatense. En la economía pecuaria, la clase acopiadora o contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias, y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda Oriental residiría entonces del lado de la oferta de mano de obra rural, debido al fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

La crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del

área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos fiscales y las levás militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;<sup>5939</sup> y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,<sup>5940</sup> seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario.

A todas estas crisis debemos agregar la crisis mercantil, central en la caída del orden mercantil-absolutista. Reconocemos en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonso (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), París (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobrevaloraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

Las crisis mercantiles y agrarias desataron a su vez una profunda crisis administrativa en el orden burocrático-patrimonialista. De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Tabaco, Sisa, y Diezmos, sus autores fueron en la mayor parte de los casos criollos.<sup>5941</sup> Esto revela que los casos de corrupción --que

constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas-- fueron sólo aquellos que gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa de originarios, vinieron a conformar una suerte de desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o Buenos Aires, y que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX latinoamericano.

Por último, cuando más perjudicada se vio la recaudación fiscal fue, como es obvio, cuando el grupo librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido esto durante las Invasiones Inglesas. En todo el año 1808 no fue posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente aumentada por disposición de las autoridades, y la Junta se vio obligada a disponer de los fondos que entraron en la primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo sobre la alcabala de 1807, ya tan demorada.<sup>5942</sup> A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el detalle de lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias practicadas al intento", ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que pasaran las boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con todos los recursos legales. Estos síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en años posteriores, a pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el gobierno. A todos estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros de Alcabala de 1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las operaciones recaudatorias de ese año.<sup>5943</sup>

Finalmente, los conflictos entre la Milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, también se les otorgó el goce del fuero militar a los Contadores y Tesoreros de las Cajas Reales principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.<sup>5944</sup> Sin embargo, como se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquieren en el oficio político.<sup>5945</sup> Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de trabajo.

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las Comandancias de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes, Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se perpetuó en el tiempo, estos últimos no cesaron de enfrentar a los primeros. Por lo demás, estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales. Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el seno del clero y la milicia de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de

parentesco fueron en estas instituciones, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

Es evidente que todos estos conflictos no resueltos socavaron la unidad de los sectores agrario (yerbatero) y minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Las desavenencias originadas por el trato desigual derivaron en particiones y separatismos (Virreinato peruano) y anexionismos (Virreinato del Plata) que fueron desestructurando el espacio colonial evocando así en la elite intelectual fenómenos semejantes que le acontecieron al antiguo imperio romano. Sin duda, en estas fracturas se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las denominadas independencia argentina, paraguaya, boliviana y uruguaya.

### **Tomo-III    Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la formación de un orden nacional-republicano (Río de la Plata/Argentina, 1808-1912).**

#### **Índice del Tomo-III**

#### **Introducción**

<b>Sección III-A</b>	<b>Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso imperial</b>
<b>Sección III-B</b>	<b>Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo</b>
<b>Sección III-C</b>	<b>Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico</b>
<b>Sección III-D</b>	<b>Disputas, rupturas y quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista</b>
<b>Sección III-E</b>	<b>Crímenes políticos en la degradación del orden liberal-republicano</b>
<b>Sección III-F</b>	<b>Putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del orden estatal-republicano</b>
<b>Sección III-G</b>	<b>Conclusión</b>

## **Prefacio**

Capítulo 0      Introducción del Tomo-III

9

### **Sección III-A      Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso imperial**

Capítulo III-A-1.-      Opciones legitimadoras tradicionales y legales      11

Capítulo III-A-2      Legitimación carismática y caudillismo (Rosismo, 1831-52).      19

Capítulo III-A-3      Retraso cultural relativo en el orden laico-republicano      15

### **Sección III-B      Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del orden absolutista al orden republicano**

Capítulo III-B-4      Rutas de peregrinación y cabotaje en la transición del orden absolutista al orden republicano  
8

Capítulo III-B-5      Expansión agropecuaria y latifundio en la provincia de Buenos Aires (1820-1852).  
16

Capítulo III-B-6      Distribución de la tierra de frontera en la república oligárquica (1852-1890).      16

### **Sección III-C      Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico**

Capítulo III-C-7      Pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-1831)  
10

Capítulo III-C-8      Pactos implícitos para garantizar la organización del estado-nación (1852-1862)7

Capítulo III-C-9; **Error! Marcador no definido.**      Interregno de paz forzada entre fracciones dominantes (1877-80)      27

Capítulo III-C-10      **Pax Roquista** o paz beligerante (1881-1886).  
25

Capítulo III-C-11      Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición      26

### **Sección III-D      Disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación de un orden notabiliar o elitista**

- Capítulo III-D-12      Crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista (1808-1820)  
2
- Capítulo III-D-13      Transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-1874)  
20
- Capítulo III-D-14      Debacle de la elite Nacional-Mitrista y origen de la oligarquía Autonomista (1874-1876)  
12
- ¡Error! Marcador no definido.**
- Capítulo III-D-15 **¡Error! Marcador no definido.**      Conflictividad interna versus externa en la cuestión santiagueña (1881-86) 25

- Capítulo III-D-16      Competitividad inter-oligárquica y abuso de la plebe (1884-86).36

### **Sección III-E      Crímenes políticos en la degradación del orden republicano**

- Capítulo III-E-17      Magnicidios políticos emanados de la guerra civil      5
- Capítulo III-E-18      Crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial. 24
- Capítulo III-E-19.--      Escarmientos anti-sediciosos y ajusticiamientos políticos (1891)26
- Capítulo III-E-20.-      Descomposición del oficialismo y atentado político (1902) 12

### **Sección III-F      Putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del orden estatal-republicano**

- Capítulo III-F-21      Colapso del estado absolutista y anexión portuguesa de la Banda Oriental o estado cisplatino (1808-1830)  
6
- Capítulo III-F-22      Crisis del estado Confederado y secesión de Buenos Aires (1852-1861) 17
- Capítulo III-F-23      Rol piemontés del enclave nacionalista porteño (1861-1866)  
28
- Capítulo III-F-24      *¡Error! Marcador no definido.***Putsch** en el interior como detonador de la Revolución del 90      27
- Capítulo III-F-25      Impacto desestabilizador de la Revolución del 90      20

Capítulo III-F-26	Ruptura del Acuerdo e interna del Autonomismo (P.A.N.)	29
Capítulo III-F-27.-	Excepcionalidad ficticia del caso argentino en el cono sur. Golpes de estado en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.	

3

### **Sección III-G**

Capítulo III-G-28	Conclusión	12
Total de páginas		395

### **Introducción del Tomo-III.**

#### **Índice**

- 0-I Los límites estructurales a las transiciones y rupturas políticas
- 0-II Plan del Tomo III

El orden nacional-republicano y quienes lo idearon buscaron legitimarlo comparando el impacto político de las guerras napoleónicas --que precipitó el colapso

del imperio español y la lenta y conflictiva emergencia de los estados naciones latinoamericanos-- con las guerras de la Germania y el Asia Menor que derivaron en el cataclismo del imperio romano y la emergencia en Europa de los reinos cristianos. Comparación esta que lleva a su vez a cotejar el impacto de la primera guerra mundial con el colapso de los imperios continentales o territoriales (otomano, austro-húngaro y zarista) y sus correspondientes balcanizaciones.<sup>5946</sup> Y el impacto de la segunda guerra mundial con el colapso de los imperios coloniales de África, Asia y Oriente Medio (británico, francés y portugués).<sup>5947</sup>

Pero así como la ideología pagana y la concepción cíclica del tiempo vigentes en el imperio romano fue desplazada por la ideología del cristianismo y su concepción lineal del tiempo y la historia, la teología barroco-inquisitorial y la legitimidad política monárquico-dinástica vigente en el imperio español fue desplazada por un creciente proceso de secularización del conocimiento o autonomía del mundo moderno profano, un estilo neoclásico-patrimonial del poder y una problemática laicización de las instituciones de la cultura.<sup>5948</sup> Vale mencionar que para Bukovansky (2002), la fuente de legitimidad, que en el período absolutista residía en la sangre dinástica y la sanción divina, fueron a partir de las revoluciones americana y francesa perdiendo poder simbólico en beneficio de la voluntad popular.

Más luego, el orden nacional-republicano --que nació con la guerra de independencia-- intentó legitimarse con un numeroso conjunto de hipótesis plausibles (Domínguez, 1985), y posteriormente con los mitos de la evolución, del progreso (el catecismo laico del siglo XIX) y del crisol de razas (donde unas regiones y etnias eran superiores a otras), y con la desigual articulación secularizadora de la educación laica, obligatoria y gratuita; el servicio militar nacionalizante y compulsivo; y la dominación simbólica chauvinista de la educación patriótica y apologética.<sup>5949</sup> Es decir, una legitimación de las filosofías, representaciones, legados y tradiciones que habían alimentado los ideales secularizantes, desmitificadores y racionalistas del orden nacional-republicano, que pudiera nutrir una identidad propia y la ampliación de un poder democrático y popular. Poder este último que debía priorizar una ética liberadora (sanmartiniana y bolivariana) y estrategias reproductoras y transformadoras (desacralizadoras, desestamentalizadoras, despatrimonializadoras, desburocratizadoras y despretorianizadoras), y que al menos debía intentar equiparar su propio poder con el de las reminiscencias del orden imperial-absolutista y con el de las fuerzas represivas del estado-nación oligárquico.<sup>5950</sup>

Para entender entonces la etiología de la tragedia sufrida en el siglo XX es preciso conocer detenidamente los momentos y las dificultades en la legitimación del orden nacional-republicano, es decir en el retraso cultural relativo, en: las peregrinaciones, anexiones y expansiones territoriales, en las conciliaciones, los pactos y las treguas, en las disputas, rupturas y quebrantos de la elite, y en los diversos momentos de crisis del sistema (guerras, crímenes políticos, putschs, secesiones y revoluciones), así como de represión física y judicial a los grupos insurgentes o revolucionarios que pretendían deslegitimar las estructuras oligárquicas vigentes.<sup>5951</sup> En ese sentido, la persistencia de la dominación tradicional y carismática habría sido la responsable de la deformación y consiguiente deslegitimación del orden nacional-republicano.<sup>5952</sup>

Asimismo, debemos tener en cuenta que a medida que las crisis del orden nacional-republicano se acentuaban, las contradicciones materiales y simbólicas se

fueron superponiendo, entrecruzando y agravando. Estas recurrencias y/o repeticiones de crisis, clivajes y eventos traumáticos dieron lugar a una urdimbre de sub-culturas o sub-órdenes que fueron la base de un complejo y multidimensional proceso histórico-político, que culminó en el siglo XX en múltiples y crecientes deslegitimaciones y fracasos del proyecto emancipatorio y republicano originario.

Las frustraciones, fracasos y traiciones del proyecto originario, vinieron a constituir el cuerpo de un orden nacional-republicano que aquí nos proponemos estudiar rastreando su genealogía hasta sus orígenes en la legitimidad absolutista y carismática y en la metanastasis, es decir en el espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de un imaginario y una auto-representación político-cultural colectiva.<sup>5953</sup> Esta metanastásis fue traumáticamente precipitada por un evento externo a la voluntad de los portadores del proyecto originario (Invasiones napoleónicas), con sus consecuentes derivaciones de resistencias, balcanización y migraciones forzosas individuales y grupales.<sup>5954</sup>

A fines de siglo, las revoluciones cívico-militares (1890, 1893, 1905) habrían pretendido una ruptura con un pasado de frustraciones y una búsqueda de un porvenir reparador, que para muchos debía contener elementos proféticos,<sup>5955</sup> y por el contrario el golpe de 1930 habría intentado un retorno al pasado conservador-oligárquico. La genealogía sería el método de rastreo o búsqueda del origen próximo o remoto de la progresiva tragedia política, que eclosionó en 1930 y que alcanzó su cenit en la década del 70. Para el estudio de estas violentas transiciones, habremos de identificar y examinar exhaustivamente los mecanismos oligárquicos en la formación de la política, la sociedad y las instituciones del orden republicano frustrado.

## **0-I Los límites estructurales a las transiciones y rupturas políticas**

La implementación de nuevas hipótesis a la explicación de las rupturas y transiciones políticas, en América Latina, y en Argentina en especial, encontró graves dificultades.<sup>5956</sup> La transición de las nociones de estamento, corporación y súbdito o vasallo --propias del orden imperial-absolutista-- a las de clase social, institución y ciudadano, propias de un orden nacional-republicano,<sup>5957</sup> encontró en el espacio y tiempo de ruptura que significó la metanastasis (desorden interno generalizado de un imaginario y una auto-representación político-cultural con sus derivaciones en la balcanización y las migraciones forzosas individuales y colectivas) límites u obstáculos que sólo comenzaron a superarse con la transformación de dicha etapa. Es decir, la transformación de un reflujo regresivo del orden absolutista (1810-1852) en una ola progresiva (Reformas de la llamada Organización Nacional), que diera lugar al nacimiento de nuevas instituciones,<sup>5958</sup> rupturas políticas (guerras inter-estatales y revoluciones o guerras civiles), y consecuentes reformas institucionales,<sup>5959</sup> expresadas en las reglas que regían las relaciones de la matriz política (Reformas Constitucionales, Leyes Codificadoras, Leyes 1420, Avellaneda y Láinez, Leyes Electorales, Ley Sáenz Peña, Reforma Universitaria, etc.).<sup>5960</sup>

De igual modo, la posterior transición desde un orden republicano aristocrático restrictivamente participativo (1880-1912) a un orden democrático competitivo y ampliamente participativo, encontró en la segunda crisis del orden nacional-republicano que significó la contra-ola regresiva (1880-1912), límites u obstáculos que comenzaron a

superarse recién con la transformación de dicha ola, es decir con la tercer ola progresiva (Reforma Electoral producida por la Ley Sáenz Peña votada en 1912).

En ese sentido, cabe formular una batería de reflexiones acerca de las olas, ciclos o fases históricas, así como sobre las guerras, revoluciones o contra-revoluciones.<sup>5961</sup> Una interpretación cíclica de la historia, había prevalecido a comienzos del siglo veinte en los medios intelectuales argentinos. Mientras para un postrer Matienzo (1930), que adoptó para la Argentina la teoría germana de las generaciones --divulgada por Ortega y Gasset (1923, 1933)-- los ciclos duraban lo que la vigencia de las generaciones,<sup>5962</sup> para Rivarola (1936), fundado en el evolucionismo idealista de Fouillé (1890, 1893, 1908, 1913), y profundizando a Matienzo, el ciclo histórico se caracterizó por ser ideológico, y por consistir en una sucesión de ideas-fuerzas, opuestas a las ideas-reflejo del empirismo inglés, que estallaban al cabo de un tiempo en crisis o rupturas políticas.<sup>5963</sup> Al primer siglo de historia argentina Rivarola lo compendia en cinco ciclos ideológicos de una treintena de años cada uno.<sup>5964</sup> En cada uno de dichos ciclos, la ruptura o crisis violenta estallaba al pasar una o dos décadas de haberse iniciado el desarrollo lógico de la idea-fuerza.<sup>5965</sup> Y para Perriau (1970) y Ortiz (1977), seguidores de las tesis de Arnold Toynbee sobre la génesis, crecimiento y colapso de las civilizaciones --quien a su vez estuvo influido por Sorokin (1927), y este por Pareto-- los ciclos históricos argentinos se reducían a períodos recurrentes de crecimiento y derrumbe o colapso.<sup>5966</sup>

Las olas, ciclos o fases ideológicas, económicas (expansivas o depresivas) y políticas (progresivas o regresivas), del ámbito nacional, tuvieron por lo general incidencia en el origen de las guerras entre estados-naciones y en las rebeliones provinciales. El restringir la participación electoral, el incurrir en incompatibilidades de sangre (nepotismo) y de oficio (legislativas, judiciales, militares, eclesiásticas, periodísticas, etc.) y el arrogar soberanía a jurisdicciones interiores o *staaffragment* desnaturalizaba el orden representativo, republicano y federal de gobierno, alimentando fracturas autoritarias y deformaciones o deslegitimaciones del orden nacional-republicano. Las oposiciones revolucionarias o anti-sistema, a nivel provincial, podían crear gobiernos y engendrar poder legítimamente constituyente. Estos conflictos, guerras, metanastasis (desorden interno generalizado de un imaginario y una auto-representación político-cultural con sus derivaciones geopolíticas o balcanizaciones y consecuencias demográficas o migraciones forzosas individuales y colectivas), revoluciones y sucesiones políticas generaban procesos de expulsión y renegociación de posiciones al interior de los diversos actores colectivos,<sup>5967</sup> reinando entre dichos actores una heterogeneidad social, económica, política e ideológica, que los volvía más propensos a sufrir el impacto de golpes y revoluciones que los gobiernos homogéneos.

No siempre los conflictos y/o fracturas (golpes, revoluciones e intervenciones federales) estuvieron inspiradas en verdaderas cuestiones de interés nacional o constitucional (violaciones de los regímenes corporativo y/o republicano de gobierno}, sino mas bien estuvieron inspirados en intereses locales o provinciales, destinados a cohesionar los clanes familiares y a legitimar intereses político-sucesorios, y condenados a repetir el pasado y a boicotear dicho proceso revolucionario. Esta batería de reflexiones nos ha llevado a formular indagaciones más precisas aún. Las fracturas, desajustes y crisis políticas acontecidas a escala nacional fueron el reflejo de conflictos ideológicos profundos, de innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, y del desencadenamiento de procesos trágicos. Por lo general las rupturas y crisis políticas provinciales no coinciden cronológicamente con crisis a escala

nacional --Catamarca en 1862 y 1863; Salta en 1864; Tucumán en 1861 y 1868; Córdoba en 1858, 1863 y 1864; Mendoza, en 1859 y 1863; San Juan en 1852, 1857, 1860 y 1861; Jujuy en 1870 y 1879; La Rioja en 1873; Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876; Santa Fé en 1867, 1877 y 1878; Corrientes en 1859, 1868 y 1878; San Juan en 1884; Tucumán en 1887; Córdoba en 1888; y Mendoza, en 1889 (Cuadro I)-- pues fueron el reflejo de conflictos y fracturas propiamente locales.

El medio siglo que corre desde Pavón (1862) hasta la Revolución del 30 fue de una democracia liberal en relativa estabilidad y crecimiento, pero su construcción y auge habría sido ficticio, pues la Argentina habría tenido un pasado --propio de la modernidad absolutista-- heredado de la conquista española y de la colonización habsburga con reminiscencias o vestigios de una elite dominante controlada por la combinación de valores inquisitoriales y renacentistas, así como un pasado Borbónico de modernidad absolutista Ilustrada con una muy embrionaria secularización y emancipación de la sociedad civil.<sup>5968</sup> Los sentimientos de las elites político-económico-culturales estaban atemorizadas por la movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de nuevas elites; por el impacto de reformas culturales (eclesiásticas, educativas, universitarias, etc.); y por el peligro de fracturas y/o revoluciones sociales que sustituyeran a un estamento por otro, o a una clase social por otra. Es así que las coaliciones autoritarias triunfantes en dichos conflictos y fracturas contribuyeron a frenar la circulación de las elites y a desacelerar la intensidad de la movilidad social. La índole continuista o anti-continuista de las salidas políticas practicadas por los gobiernos autoritarios y de las transiciones experimentadas por los gobiernos democráticos competitivos aunque parcialmente participativos estaba en relación directa con el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada por las facciones capitulares durante el orden imperial-absolutista, y por los clubes y partidos políticos durante el orden nacional-republicano.

Las innovaciones institucionales (reformas constitucionales, legislativas, electorales, administrativas, educativas y eclesiásticas) y tecnológicas (estructuras pedagógicas, urbanísticas, financieras, administrativas, militares y comunicacionales) se extendieron a todos los espacios nacionales y a las estructuras formales del poder estatal. Pero estas innovaciones no fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del estado, retrogradando el sistema político, poniéndolo al servicio de los intereses y los resabios de un orden colonial-absolutista, aún persistente, y reproduciendo las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas). El nepotismo y sus variantes (yernocracia, cuñadismo, etc.), existieron en el orden nacional-republicano junto con otras incompatibilidades e inconclusividades que afectaron los principios de la división de poderes, la periodicidad de los cargos públicos y la circulación de las elites

La inercia o atraso relativo de las tradiciones y prácticas pre-republicanas y pre-liberales (falta de separación entre la sociedad civil y el estado), las crónicas desviaciones, fracturas o desajustes de los órdenes absolutista y republicano de gobierno (golpes, motines, conjuras, sediciones, pronunciamientos, etc.) y el cíclico desarrollo político, económico y cultural rioplatense y argentino,<sup>5969</sup> fueron la materia prima que alimentó la reflexión y el análisis de las estrategias implementadas por las elites nacionales y provinciales respecto a las políticas culturales, económicas y sociales.<sup>5970</sup> Los conflictos y fracturas políticas (golpes, guerras, revoluciones y magnicidios), se contagiaban entre sí en una suerte de efecto dominó o sugestión mimética provocada por meras venganzas y espíritu de conquista. Por lo general, las crisis económicas y los procesos inflacionarios y

deflacionarios trasladaban su impacto a la esfera política. Cabe entonces estudiar cada conflicto y cada fractura (golpe, revolución, guerra, crisis, ruptura o magnicidio) en forma aislada e independiente pues el carácter, la intensidad, la duración, la distribución y la combinación de las líneas de fractura o clivaje cambiaba en cada provincia. En ciertas provincias algunas líneas de fractura monopolizan la vida política y en otras provincias existen fracturas cruzadas, o muy atenuadas, o directamente no existen. Las diferencias entre las provincias se deben a factores subjetivos o psico-culturales, es decir al grado en que ciertas líneas de fractura se han movilizad o pasado de la conciencia a la acción, o se han politizado por contar con cierto liderazgo.

Para contestar los interrogantes que surgen de la presencia de conflictos y fracturas debemos contrastar las teorías de la gestación de partidos y facciones políticas por difusión territorial y/o por penetración geográfica, y de dominación burocrática o carismática, de Panebianco, 1988; el grado de conflictividad de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas (teorías de los vínculos reforzadores y cruzados), función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política), y la correlación entre su conflictividad interna y la externa, de Ross (1985, 1995); y la tesis de las alianzas entre facciones duras y reformistas de las coaliciones oficiales con facciones moderadas y radicalizadas de las coaliciones opositoras, de Przeworski (1991).

Estas reflexiones, análisis y teorías nos mueven asimismo a practicar indagaciones propiamente histórico-políticas. El fenómeno conocido como revolución de independencia habría sido un proceso de metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de un imaginario y una auto-representación político-cultural, con sus consecuentes derivaciones en la balcanización y las migraciones forzosas individuales y colectivas, que a su vez tuvo remotos orígenes en las guerras civiles del siglo XVI entre Almagro y Pizarro (que dio origen al desprendimiento de Chile del Perú), en las rebeliones comuneras de los siglos XVII y XVIII (origen de la independencia paraguaya), en la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (antecedente de la emancipación Boliviana), en las guerras de originarios (Arauco, Calchaquí, Guaycurú, Charrúa), en las guerras guaraníicas y en las libradas para la recuperación de la Colonia del Sacramento, en la expulsión de los Jesuitas y en las Reformas Borbónicas, incluida la des-jesuitización de la cultura (educación, vida universitaria y producción libresca).

Las particiones, disoluciones, separatismos y secesionismos de raíz etno-lingüística (Paraguay, Bolivia), y los éxodos (Jujuy, Banda Oriental, Chile) y guerras civiles (1820, 1840) habrían sido el fruto de la metanastasis; y las ejecuciones y ostracismos el producto de una restauración del orden absolutista inquisitorial. La segunda Cruzada Libertadora (Uruguay, 1864), la Segunda Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1865), y la represión de las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del Lopizmo en Santa Fé (levantado contra los gobiernos laicistas de Cullen, 1862, Oroño, 1864-67, y Aldao, 1866), y de López Jordán en Entre Ríos (1870, 1873 y 1876) habrían sido necesarias derivaciones de la victoria del orden modernizante nacional-republicano acontecido en Pavón (1862). La Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70) se habría debido a la aplicación de la doctrina de la balanza del poder en la Cuenca del Plata y a la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/1875).<sup>5971</sup>

Las rebeliones Jordanistas habrían tenido derivaciones en la Revolución de las Lanzas (1870) y la Revolución Tricolor en Uruguay (1875), con la de La Verde en Buenos

Aires (1874), y con la de Santa Rosa en San Luis (1874), y éstas últimas con los derrocamientos de los gobiernos de Civit en Mendoza (1873) y de Gómez en San Juan (1884), y con las rebeliones liberales de Jujuy (1877) y Corrientes (1878) y con la Revolución del 80 en Buenos Aires. La derrota del Liberalismo Mitrista en La Verde (1874) y Santa Rosa (1874) y la consiguiente caída de los Taboada en Santiago del Estero (1876). Los casos de la rebelión Jordanista en Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876, la rebelión Conspicua en Jujuy en 1877, o la rebelión Liberal en Corrientes en 1878 se habrían generalizado a otras regiones. Los golpes de palacio --instigados por facciones del oficialismo Roquista-- ocurridos en Corrientes (1881), Santiago del Estero (1882) y San Juan (1884), y la Revolución del Quebracho acontecida en el Uruguay (1886) tendrían íntimas conexiones entre sí. Y los golpes de estado Juaristas triunfantes en Tucumán (1887), Córdoba (1888) y Mendoza (1889) tendrían a su vez profundos efectos de demostración.

Para intentar dar respuesta a una larga serie de interrogantes encaramos el análisis de las interpretaciones historiográficas que se dieron tanto en las polémicas parlamentarias como en los debates académicos y periodísticos. Para este estudio hemos instrumentado la información histórico-genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>5972</sup> y centenares de textos de época hallados en los Diarios de Sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de Senadores, nacionales y provinciales; en los periódicos depositados en las hemerotecas de la Biblioteca del Congreso, Biblioteca Nacional, Museo Mitre, Universidad de La Plata, y Parque España (Rosario); en las compilaciones documentales editadas y en los epistolarios de los archivos presidenciales y provinciales del siglo XIX (Mitre, Paz, Roca, Juárez Celman, Victorino de la Plaza, y Agustín P. Justo), del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del de Buenos Aires Dardo Rocha; correspondencia mantenida con gobernadores, ministros y legisladores;<sup>5973</sup> depositados todos en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires.

## **0-II Plan del Tomo-III**

Este estudio se extiende a lo largo de una extensa introducción, seis secciones y veintiseis capítulos. La introducción está subdividida en dos apartados. La Sección-A estudia el colapso imperial y las legitimaciones tradicionales, legales y carismáticas. La Sección-B indaga las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo. La Sección-C explora las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico. La Sección-D contempla las rupturas y quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista. La Sección-E indaga los crímenes políticos en la degradación del orden republicano. Y la Sección-F los putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del orden estatal-republicano.

### **Sección III-A Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso imperial**

Cabe hacer la necesaria salvedad que a diferencia del colapso del imperio español, que se precipitó debido al cautiverio de la familia real; el imperio portugués pudo sortear indemne la invasión napoleónica merced a la muy oportuna decisión de mudar la metrópoli desde Europa a América, es decir desde Lisboa a Río de Janeiro.<sup>5974</sup> Esta mudanza impidió el cautiverio de su monarca y el colapso e inevitable balcanización de sus dominios, que

acontecimientos como la Inconfidencia Minera (1789) preanunciaban.<sup>5975</sup> Más aún, invirtió los roles transformando a Río de Janeiro en metrópoli y a Lisboa en una localidad sufragánea. Por el contrario, en la América española la prisión de Fernando VII disparó un proceso de transferencia de legitimidad y por consiguiente balcanización. Ahora bien, esta realidad crítica dio lugar a múltiples interpretaciones que aquí vamos a investigar.

En esta sección, dedicada a indagar el colapso o derrumbe imperial, la restauración absolutista y el atraso cultural, trato en tres (3) capítulos consecutivos: las opciones legitimadoras tradicionales y legales, la legitimación carismática (Rosismo, 1831-52), y el retraso cultural relativo en el orden laico-republicano.

### **Capítulo III-A-1.- Opciones legitimadoras tradicionales y legales**

#### **Índice**

- A-I.- Tradición historiográfica del colapso imperial o fenómeno metanastásico.
- A-II.- Interpretación de los mitos fundacionales.
- A-III.- Cuestión de la legitimación de la revolución.
- A-IV.- Supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad revolucionaria

#### **A-I.- Tradición historiográfica del colapso imperial o fenómeno metanastásico.**

A diferencia de la historiografía socio-económica tradicional (Real de Azúa, 1961 y Martínez Peláez, 1971), que particularizaba el estado colonial en la noción de patria, Barman (1988), Rojas Mix (1992), Guerra (1993) y Goldman y Souto (1997) ensayaron para las repúblicas independientes surgidas del colapso del orden imperial-absolutista la categoría de estado-nación como comunidad política imaginaria.<sup>5976</sup> Igualmente, a diferencia de la historiografía tradicional acerca de las revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante. Skocpol (1984) es la única autora que argumenta que las presiones y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, tenían a las elites urbanas ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario.<sup>5977</sup>

En el caso de la América Latina colonial, para Pietschmann (1982) y Andrien (1984) el clima de corrupción crónica y la consiguiente crisis fiscal aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario. Pero fue Trimberger (1978), quien primero arguyó, al referirse a las revoluciones japonesa (meiji), y turca (kemalista), que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios sociales

revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.<sup>5978</sup> Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.<sup>5979</sup>

Para enfatizar la importancia del rol jugado por la política por sobre la economía en los cambios revolucionarios, Lachmann (1990) sostuvo la hipótesis que lo que determina la formación de nuevas clases sociales, como la burguesía y el proletariado, y nuevos modos de producción como el capitalismo, son los conflictos en el seno de las elites --que se dieron en llamar contradicciones secundarias-- y no lo que tradicionalmente se dio en llamar crisis económicas o contradicciones principales o fundamentales o lucha de clases o guerras de liberación nacional. Higley, Burton y Field (1990) sostuvieron también que la frecuente desunión y/o divergencia entre las elites es lo que alimenta la inestabilidad política y la consiguiente discontinuidad institucional. Para el caso del Río de la Plata, Garavaglia (1973a) fue el primero en señalar que las dificultades para comprender el nuevo estado que regirá las naciones surgidas de la Revolución de Independencia obedecían a que "...gran parte de los estudios dedicados al estado colonial, no van más allá de lo meramente descriptivo o son dignos exponentes de la historia vulgar".<sup>5980</sup> No obstante, Knight (1990) y Ankersmit (1989) han refutado esta tesis alegando que la aproximación "estatista", sin tomar en cuenta las luchas sociales y la movilización de grandes contingentes humanos, no puede explicar porqué las revoluciones acontecieron, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.<sup>5981</sup>

La tesis que sostiene que el orden imperial-absolutista español se pudo romper desde dentro a través de una suerte de guerra civil, nutrida por la ideología renacentista española (Escuela de Salamanca: Suárez, Vitoria), por cuanto en su periferia colonial se carecía de una burguesía capaz de enfrentar a la metrópoli, alimentó la hipótesis de que la causa de la independencia fue principalmente el resentimiento político de los criollos por el desplazamiento de las posiciones burocráticas sufrido con las reformas borbónicas.<sup>5982</sup> En tanto que para Badia Malagrida (1946) seguido por Randle (1966) y Scenna (1970), la causa de la desintegración geo-política sufrida por las colonias españolas en América debe encontrarse en el rol desplegado por las metrópolis imperiales más que en el rol jugado por el resentimiento criollo.

A diferencia de Halperín Donghi (1985), quien sostiene que en Chile y Argentina, contrariamente a lo que ocurrió en México y Perú, la historiografía de la independencia no buscó inspiración en la colonia, encontramos que los historiadores románticos (Alberdi, 1856; V. F. López, 1865-66) asignaban el origen histórico de la independencia a la naturaleza federalista y autónoma de las instituciones del orden corporativo colonial, tales como los cabildos, los cuales según ellos resistían el orden centralista y absolutista de obispos y gobernadores desde los mismos comienzos de la dominación colonial en los siglos XVI y XVII. De igual manera, aquellos historiadores pertenecientes a una tradición positivista (Mitre, 1871; Quesada, 1881; Sarmiento, 1883; Ramos Mexía, 1887; García, 1900; y Groussac, 1907) atribuyeron también los orígenes históricos de la revolución de independencia y las guerras civiles al rol jugado en la era colonial por las luchas intra-coloniales a nivel municipal.

## A-II.- Interpretación de los mitos fundacionales.

Tanto la legitimidad fundada en la voluntad popular proyectada por Moreno, como la cifrada alrededor de los poderes de excepción diagramada por Monteagudo, y la posterior de Mitre y Sarmiento imitaron con escaso beneficio de inventario las legitimaciones formuladas por las modernas naciones-estados europeas y norteamericana, las que a su vez habían reproducido los mitos y modelos de la antigüedad griega y romana.<sup>5983</sup>

Pero la tradición positivista que siguió a dichos actores o protagonistas de la historia no fue unánime en la interpretación de los mitos fundacionales y los modelos de legitimidad.<sup>5984</sup> El mito fundacional construido por Mitre (1859) y por J. A. García (1900),<sup>5985</sup> alimentados por las teorías modernas del pacto y la soberanía (Rousseau), sostuvo la prioridad de la nación sobre las provincias, y le atribuyó a la modernidad Iluminista, propia del estado colonial-Borbónico (es decir al Virreinato), el verdadero origen de la nacionalidad argentina.<sup>5986</sup> Más aún, esa tradición positivista aludía a la irreversible necesidad de una guerra de independencia para construir una nueva legitimidad alrededor de un estado-nación y no ya sufragánea de un estado imperial.<sup>5987</sup> No obstante, en el mito y el modelo de legitimación de Mitre no contaron los trágicos sucesos desencadenados en España con el cautiverio de Fernando VII (1808), ni las formaciones republicanas efímeras (Tucumán y Entre Ríos), y los desmembramientos nacional-estatales del Alto Perú, Paraguay y Banda Oriental, y mucho menos los modelos fracasados de legitimidad, como ser la legitimidad del caudillismo reconocida en los Pactos preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 (Pilar, 1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 1852) y la legitimidad del estado confederado con cabecera en Paraná o San Nicolás (1852-61).<sup>5988</sup>

Por el contrario, para la tradición crítica de José María Estrada (1865), fundado en el pensamiento de Alberdi (1856), la independencia del Paraguay y la legitimación de su mediterraneidad se asociaba con el mito fundacional de la revolución comunera y el trágico fin de su carismático líder el neogranadino José de Antequera, derrotado por las tropas de las Misiones Jesuíticas enviadas por ordenes del Virrey del Perú y el Gobernador de Buenos Aires (1735). Y para la tradición revisionista de Joaquín V. González (1888) y de Ricardo Rojas (1954), basada en el pensamiento de V. F. López (1865-66, 1871) -- quien a su vez se hallaba influido por el impacto difusionista del genealogismo mítico germanista de Thierry y de Guizot (opuesto a la universalidad del romanismo jurídico)— se debía patrocinar como mito fundacional de un estado confederado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata, a un modelo de legitimidad tradicional de orden dinástico conocido como la “nación primordial incaica”, por encima del estado colonial Borbónico.<sup>5989</sup> Posteriormente, la historiografía uruguaya adoptó como razón de origen de su identidad nacional a la vieja disputa del puerto de Montevideo con el de Buenos Aires; y luego a su condición de estado encajonado (tapón, colchón o cuña); a la posición marginal concebida por la diplomacia de Lord Ponsomby para amortiguar el expansionismo lusitano; y a la consiguiente rivalidad de sus dos poderosos vecinos (Buenos Aires y Río de Janeiro). Asimismo la historiografía boliviana asignaba como mito de origen de su independencia nacional su derecho a heredar la jurisdicción que había correspondido a la antigua Real Audiencia de Charcas (1566-1767).<sup>5990</sup>

Así fue que, en el afán de “desencajonar” la mediterraneidad o encerrona paraguaya, el ideólogo Bernardo Berro bosquejó una confederación entre el Uruguay, el Paraguay y la mesopotamia Rioplatense.<sup>5991</sup> Pero el plan estratégico ideado por Berro carecía de factibilidad geopolítica por tratarse de territorios discontinuos lejanamente conectados entre sí por una vía fluvial (Río Uruguay) de escasa navegabilidad de altura. Esta escasa factibilidad, si hemos de compararla con la del Río Paraná, se confirmó luego cuando se desencadenó la catastrófica Guerra de la Triple Alianza (1865-69).<sup>5992</sup> Y en forma semejante, quince años más tarde, al percibir la elite chilena su encajonamiento entre el Perú y la Argentina elaboró una estrategia expansionista para anexarse el litoral marítimo boliviano y enclaustrar a Bolivia desatando así también la trágica Guerra del Pacífico (1879).<sup>5993</sup>

### **A-III.- Cuestión de la legitimación de la revolución**

La cuestión de la legitimación de la revolución ha sido una temática poco cultivada entre nuestros historiadores.<sup>5994</sup> Di Meglio (2006) ha sido el primero en nuestro medio en abordarla con una originalidad digna de encomio, tomando prestada la noción del extinto historiador francés Guerra (1998) y del chileno León Solís (2002).<sup>5995</sup> Di Meglio centra su interés en la noción de legitimidad para conocer su impacto en los sectores integrantes de lo que se conocía como “plebe”.

Entre las formas de legitimación tradicional, la monárquica es la que concentraba el mayor de los intereses. Entre las formas de legitimación monárquica, en la América Hispánica la legitimidad incásica arrancaba con la misma conquista. Para la ideología del pactismo, propia de la Escuela de Salamanca (Suárez, Mariana, Vitoria), la conquista era un pacto fundador por el cual los reinos indígenas, a semejanza de los reinos musulmanes, se incorporaron a la corona de Castilla.<sup>5996</sup>

Posteriormente, la transferencia de legitimidad que el colapso imperial hizo posible debía ser consolidada con la apelación a la legitimidad de la monarquía incásica. Primero Vial Correa (1966), treinta años después König (1996), y casi cuarenta años más tarde Díaz-Caballero (2005), argumentaron que para la formación de una nación independiente la elite criolla debía movilizar a las masas indígenas del macizo andino y del altiplano y para ello apelar a una identidad ancestral pre-hispánica, más luego conocida como indigenismo criollo, con distintas denominaciones según la región geográfico-cultural implicada (incaismo, aztecismo, araucanismo).<sup>5997</sup> La apelación al indigenismo criollo fue entendida también como una estrategia simbólica legitimadora tanto en el sentido de recuperación de una edad de oro, o de una libertad perdida que se habría disfrutado durante las dinastías incaica y azteca, como en el de una apropiación del trágico legado de las rebeliones indígenas, en especial las de sus carismáticos cabecillas: Lautaro, Caupolicán, Tupac Katari y ambos Tupac Amaru, aplastados estos últimos por las fuerzas conjuntas enviadas desde Lima y Buenos Aires.<sup>5998</sup>

König dice bien que la elite criolla del noroeste había recurrido a la trágica epopeya de las poblaciones autóctonas desde mucho antes que se produjera la emancipación, como lo hemos atestiguado en el tomo anterior con la difundida poesía épica del paraguayo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán (vecino de La Rioja), redactada y ampliamente difundida

en la campaña por vía de los payadores y su primitiva cultura oral en ocasión de la rebelión Tupamarista (1782).<sup>5999</sup> La apelación a dicha epopeya ocurrió luego de los acontecimientos de Mayo de 1810 y de los trágicos sucesos de Cabeza de Tigre cuando fue ajusticiado el carismático líder de la Reconquista y ex virrey del Río de la Plata Santiago de Liniers (VIII-1810), y cuando con el Ejército Expedicionario del Norte se desató en el Alto Perú una suerte de guerra de religión en oportunidad de la vigencia de ambos Triunviratos (1811-1813).<sup>6000</sup> Dicha guerra fue la respuesta a la reanexión del Alto Perú por parte del Virreinato Peruano, leal a la corona.<sup>6001</sup> Y finalmente, dicha apelación ocurrió expresa y formalmente cuando se convocó la Asamblea Constituyente del año XIII (1813), como alternativa discursiva a una independencia o soberanía que se anunciaba como meramente provisional, condicionada primero por el enclave realista de Montevideo (Virrey Elío), y luego por la primera invasión portuguesa (Diogo de Sousa), justificada so pretexto de la anarquía artiguista.<sup>6002</sup> Ambos condicionamientos habían engendrado la necesidad de un férreo gobierno centralizado y la transitoria adopción --como diplomacia política de supervivencia-- de la denominada “máscara de Fernando VII” (1810-14).<sup>6003</sup>

La provisionalidad de la estrategia enmascaradora, obedecía a la circunstancia que la dinastía portuguesa de los Braganza (desde su mudanza en 1808 sus dominios en América se denominaron Reino de Brasil, integrado al [Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve](#)), alegaba derechos hereditarios sobre los dominios españoles --incluido el puerto de Montevideo que se hallaba en manos realistas-- por ser la esposa de su monarca hermana del rey cautivo (Princesa Carlota hermana de Fernando VII y esposa del rey Joao VI); así como también facultades o prerrogativas derivadas de la teoría de las fronteras naturales, que los portugueses entendían alcanzaba todo el inmenso territorio comprendido entre las cuencas del Amazonas y el Río de la Plata.<sup>6004</sup> De esta pugna geopolítica emanaron diversos diseños e imaginarios políticos.<sup>6005</sup>

#### **A-IV.- Supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad revolucionaria**

La supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad que se iba plasmando con el devenir del régimen que surgía del colapso imperial planteaba numerosos interrogantes, incertidumbres y enigmas. Diversos historiadores (Pimenta, Díaz-Caballero y Ternavasio) plantean tres modelos distintos para interpretar los hechos producidos en la década posterior al colapso. Para el historiador brasileiro Garrido Pimenta (2002), la reorganización política que se imponía ofrecía sólo tres propuestas; a) la monarquía bragantina con amplios dominios territoriales en la América española; b) la monarquía borbónica americana; o c) el estado americano heredero del virreinato.<sup>6006</sup> Y para el historiador peruano Díaz-Caballero (2005), pensar el futuro hispano-americano obligaba contemplar la emergencia de tres imaginarios legitimadores: a) la legitimidad pactista de la soberanía popular elaborada por la Escuela de Salamanca (Suárez, Vitoria), fundada en la legislación medieval española (Siete Partidas); b) la legitimidad legal-racional del republicanismo francés fundada en la voluntad popular; y c) la restauración de la legitimidad tradicional-dinástica incaica.<sup>6007</sup>

Según Díaz-Caballero, con el agotamiento del proyecto Carlotista provocado por la liberación del rey cautivo que la derrota napoleónica hizo posible (1814), después de ocurrido el desastre de Sipe-Sipe (1815), y en el afán de emular a la Casa de Braganza y su capacidad de mantener cohesionado el Reino de Brasil, el tercer y último imaginario (impulsado por Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán) hubo de ser el único en

prevalecer, aunque esporádicamente, por sobre los otros dos proyectos.<sup>6008</sup> Y para Ternavasio (2007), Monteagudo esgrimió en oportunidad de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma (1813) el modelo de la dictadura romana.<sup>6009</sup> Pero un año después, derrotado definitivamente el enclave realista de Montevideo (batalla de El Buceo, 1814), el Directorio se dio a la tarea de crear provincias y diseñar sus límites territoriales.<sup>6010</sup>

Debido en parte a la fuerza de la tradición guaraní vigente en el ámbito Rioplatense --el cual carecía de un mito unificador (por tratarse de sociedades tribales semi-nómadas afectadas por la Expulsión de los Jesuitas y explotadas en las vaquerías o “desarreglo de los campos”)-- y merced a la prédica periodística adversa del mestizo aymara Vicente Pazos Kanki, la hegemonía de la legitimidad dinástica incásica comenzó a ralear.<sup>6011</sup> Esta crisis del imaginario incaico se acentuó primero cuando a partir de la resistencia Artiguista se produjo la segunda y más prolongada invasión portuguesa a la Banda Oriental, una reelaboración militar del proyecto Carlotista (Lecor, 1817-26); y luego cuando se entró a considerar durante el Directorio, en el gobierno de Pueyrredón, la importación de un monarca de la dinastía de Orleans (1816-1819).<sup>6012</sup> Más luego, dicha crisis del imaginario incásico se ahondó cuando se privilegió la expansión geográfico-ganadera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, mediante el régimen enfiteutico (1822-26); y hubo de extinguirse definitivamente, al producirse el separatismo Alto-peruano en 1826.<sup>6013</sup> Finalmente, con el motín de Arequito y la batalla de Cepeda (1820) quedaron los proyectos monarquizantes definitivamente sepultados, la unidad del espacio rioplatense gravemente comprometida, y la gesta Artiguista derrotada por las fuerzas portuguesas.<sup>6014</sup>

En medio de este nuevo caos, que acentuaba el fenómeno metanastásico, en la primera mitad de la década del veinte (1821-24) cuando se gestaron los avances revolucionarios en México y Perú (Ayacucho, 1824); al sepultarse los proyectos de una monarquía dual regida por dos congresos (uno en Lisboa y el otro en Río); y al producirse el retorno del rey Joao VI a Portugal, los supuestos derechos hereditarios de los Braganza sobre la América hispana desaparecieron definitivamente. La permanencia en Brasil de su hijo Pedro como Príncipe-Regente garantizó el status de Brasil como reino pero no su ocupación forzada de la denominada provincia Cisplatina (Banda Oriental).<sup>6015</sup> Un año más tarde, al consagrarse la independencia de Brasil (1822) y ser coronado Pedro I como emperador, se entró a considerar por parte de la nueva corte imperial la formalización de la anexión de la provincia Cisplatina, con el ahora titulado Imperio de Brasil.<sup>6016</sup> Frente a dicho escenario de blanqueo de una situación de fuerza que en su origen se había anunciado como meramente transitoria, y operada la definitiva derrota española en Ayacucho (1825), la elite política porteña entró a contemplar la recuperación definitiva de la Banda Oriental bajo un nuevo modelo político.<sup>6017</sup>

La beneficiaria directa de este eclipse ideológico y diplomático fue la legitimidad del proyecto republicano y su portavoz más próximo fue el General Alvear, el único en ese entonces capaz de organizar el combate contra el régimen monárquico-esclavista brasileño y de incitar una reconquista militar de la Banda Oriental, debilitada por el desmembramiento de unidades militares portuguesas, muchas de las cuales habían retornado a Europa con motivo de la independencia.<sup>6018</sup> Para enhebrar una nueva legitimidad se venían debatiendo --no sin violentos incidentes-- los modelos de legitimidad legal de los *ideologues* (Destutt de Tracy, Constant) y los del utilitarismo Benthamiano.<sup>6019</sup> En resumidas cuentas, para Bukovansky (2002) la fuente de legitimidad, que en el período absolutista residía en la sangre dinástica y la sanción carismática divina, a partir de las

revoluciones americana y francesa fue paulatinamente perdiendo poder simbólico en beneficio de la legitimidad racional fundada en la voluntad popular.

## Capítulo III-A-2

### **Legitimación carismática y caudillismo (Rosismo, 1831-52).**

19

## Índice

- B-I Legitimidad carismática y velo simbólicamente republicano
- B-II Análisis de vestigios o supervivencias históricas.
- B-III. Justicia carismática e inamovilidad de los jueces.
- B-IV. Gelatinización de la sociedad civil.

## **Introducción del capítulo III-A-2**

La metanastasis o desorden interno generalizado producida por el colapso del orden imperial-absolutista, que se manifestó durante las décadas previas a la promulgación de la Constitución de 1853 en la anarquía y las guerras civiles, fue la materia prima que nutrió los análisis históricos acerca de la fractura o desajuste institucional que significó la primer contra-ola regresiva del siglo XIX.<sup>6020</sup> Esta contra-ola habría sido la tercera que transcurrió desde que se inició la Conquista y Colonización de América, y coincidió con la fase de estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev,<sup>6021</sup> con el segundo ciclo ideológico de Rivarola (1936), y con la primera etapa de colapso de Ortiz (1977).<sup>6022</sup> Esta contra-ola apelaba al legado barroco e inquisitorial de la colonización Habsburga y había reaccionado contra la tercera ola progresiva, engendrada por los procesos de secularización de la cultura y el estado y de laicización de la embrionaria sociedad civil iniciados por las Reformas Borbónicas (Expulsión de la Compañía de Jesús y des-jesuitización de las universidades) y por las Revoluciones Francesa y Latinoamericana.<sup>6023</sup> Esta etapa de crecimiento, formulada por Ortiz (1977), arrancaba con la mencionada Expulsión de los Jesuitas (1766) y se prolongaba hasta la crisis del año 20 y las reformas eclesiásticas Rivadavianas.

La teoría política reciente ha analizado la tesis acerca del colapso del orden imperial-absolutista español y del consiguiente desmembramiento o partición del espacio imperial, de Colom (2003); la transferencia de la dependencia Española a la dependencia Británica, de Stein y Stein (1970); las tesis de la persistencia o inconclusividad de los Antiguos Regímenes y sus estructuras socio-políticas pre-modernas y pre-capitalistas, de Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Mayer (1981, 1984); las concepciones descendentes y ascendentes del poder y del derecho de Ullmann (1985); las tesis de la secularización de Marramao (1998); de la inmunización de Esposito (2003); y de la inercia de los subsistemas socio-institucionales, en conflicto o desajuste con la velocidad de recepción de nuevos paradigmas tecno-económicos o estilos tecnológicos, de Pérez (1983); y la doctrina de la balanza del poder, de Hoffmann (1991) y Morgenthau (1992); y de las sanciones colectivas, de Heckathorn (1990) y Palaver (1995).

El mecanismo de representación estamental propiamente dicho (el capitular), legado histórico del orden imperial absolutista Habsburgo, y que las Reformas Borbónicas propiciadas por Carlos III --que habían confluído con la reforma preconizada por la Congregación de Propaganda Fide, y con la reforma propiciada por el papa Benedicto XIV-- no alcanzaron a disolver, era un embudo o "cuello de botella", pues se había constituido mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los elegibles (voto pasivo) y de los elegidos (voto activo) a un ínfimo núcleo de parientes, lo cual tornaba al parlamentarismo pre-moderno de los Cabildos y la administración de justicia que de él dependía en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.<sup>6024</sup> Por ello, la competitividad judicial y electoral que existió en los parlamentos pre-modernos (Cabildos) fue muy inferior a la que prevaleció en el parlamentarismo moderno (Cámaras de Representantes), surgido de una fractura institucional.<sup>6025</sup> En dichos parlamentos pre-modernos (Cabildos del período Habsburgo) la competitividad electoral era también limitada pues en principio estaba compuesta por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación.<sup>6026</sup>

Sin embargo, la aplicación de las metodologías del Nuevo Institucionalismo --para explicar la competitividad político-electoral y la formación de coaliciones políticas-- al parlamentarismo moderno (Congreso de Representantes, Convenciones Constituyentes y Juntas o Salas de Representantes), de comienzos del siglo XIX, intentada por Ternavasio (1995a), encuentra las limitaciones propias de todas las sociedades permeadas por una idea de la política homologada a la pareja conceptual amigo-enemigo, en virtud de la prevalencia de la guerra civil y la lucha facciosa.<sup>6027</sup> Por el contrario, la teoría política reciente concluye que aún en la época republicana subsisten reminiscencias o supervivencias de la legitimidad absolutista (estamental, corporativa, territorial, esclavista y patrimonial) y de la responsabilidad colectiva, o del chivo expiatorio, o de la llamada "culpa de la inocencia",<sup>6028</sup> en desmedro de los principios de la responsabilidad individual y de la igualdad ante la ley.<sup>6029</sup> Asimismo, Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y Scully (1992) sostienen que en las supervivencias de los antiguos regímenes y en el origen de los conflictos políticos se combinan y superponen fracturas pre-modernas o genéticas de diversa índole (centro-periferia, campo-ciudad, iglesia-estado, estamentos de nobles o patricios y de plebeyos, castas de blancos o españoles y negros o indios, y pobres-ricos).<sup>6030</sup> Finalmente, Ross (1985, 1995) sostiene que el grado de conflictividad de una sociedad es función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política).

Estas hipótesis, teorías y modelos de análisis estratégicos nos han hecho formular una extensa serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, y en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo. La fragmentación del espacio colonial y la des-institucionalización de las funciones centrales de un estado alimentaron la politización de las fracturas religiosas, comunitarias y étnicas heredadas del orden imperial-absolutista. Estas fracturas pre-modernas (religiosas, regionales, estamentales, comunitarias y corporativas) absorbían la eventualidad de las fracturas modernas (políticas, económicas y sociales). La estructura discursiva del caudillismo (coronelismo en Brasil, y caciquismo en España), encarnada en los principios profanos de la lealtad o fidelidad personal, la irracionalidad, la religiosidad o supersticiosidad pagana, la virilidad, la belicosidad, la irrespetuosidad en las leyes, etc. habría devenido en mito institucional racional. A su vez, las sucesivas guerras acontecidas en la Cuenca del Plata en la primera mitad del siglo XIX habrían desarticulado en dicha región el equilibrio o balanza del

poder. Las coaliciones políticas que protagonizaron la tercera contraola regresiva (1827-1852) testimonian la inercia del parlamentarismo pre-moderno y de las tradiciones pre-burguesas y pre-republicanas, y el inicio de una decadencia política, económica y cultural que perduró hasta mediados del siglo XIX y que había seguido a una etapa de auge iniciada en 1810.<sup>6031</sup> Las coaliciones autoritarias habrían obedecido así a sentimientos paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por:

1) una movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de una nueva elite y una nueva burguesía;

2) el impacto de la Reforma Eclesiástica Rivadaviana;<sup>6032</sup>

y 3) el peligro de una revolución social?;

Finalmente, el Pronunciamiento (1851), por el cual la provincia de Entre Ríos secesionó de la Confederación Argentina, habría influido en las sucesivas crisis, acuerdos y guerras ocurridos en la Cuenca del Plata (Paz de Octubre de 1851, Tratado del Acuerdo entre Entre Ríos, Uruguay y el Imperio del Brasil; Caseros o Primera Guerra de la Triple Alianza; Acuerdo de San Nicolás, etc.).

## **B-I Legitimidad carismática y velo simbólicamente republicano**

En el sentido apuntado por estas tesis, diversos autores encuentran las causas de la transición regresiva de un régimen de competitividad internotabiliar moderno (Cámara de Representantes Rivadaviana) a uno de legitimación carismática, de unanimidad absolutista (Legislatura Rosista), o surgimiento de una contraola regresiva, a muy diversos factores.<sup>6033</sup> Entre ellos, se asigna la débacle de la hegemonía intelectual de los pensamientos jacobino y utilitarista (la Restauración en Francia, 1818), a la preeminencia ganada por la Santa Alianza en Europa (1823), la cual se hallaba liderada por la intelectualidad conservadora (Canciller Metternich).<sup>6034</sup> La pérdida de la hegemonía intelectual por parte de la burguesía mercantil se dio violentamente a manos de una pujante proto-burguesía terrateniente; y el temor de la burguesía mercantil a una movilidad política y social descendente estuvo provocado por la emergencia de una nueva elite y una nueva burguesía.<sup>6035</sup>

En esa época, los desacuerdos sobre problemas contemporáneos (trágico fusilamiento de Dorrego y posterior Bloqueo Anglo-Francés), habrían sido el punto de partida para politizar las divergencias sobre la memoria histórica, materializada por un lado en el discurso "restaurador" de Bernardo Berro, Lorenzo Torres, Nicolás Mariño y Felipe Arana, y por el otro en el discurso de José Mármol y los integrantes de la Asociación de Mayo.<sup>6036</sup> Y el punto de llegada o destino serían los desacuerdos sobre el contenido de los mitos de origen, es decir sobre la interpretación del discurso y consiguiente narración del pasado revolucionario, entre quienes se arrogaban la filiación de herederos de una revolución americana, centrada en el criollo, tributaria de la Revolución Francesa, y aquellos otros --como el Federalismo y el Rosismo-- que renegaban de dicho legado para parapetarse tras una legitimidad carismática y un velo simbólicamente republicano, pero esencialmente cesarista o bonapartista, pues el Rosismo también aspiraba a instaurar un nuevo ritual o calendario de efemérides y un nuevo mito o momento originario.<sup>6037</sup> En su reciente obra, Salvatore (2003) se pregunta por qué razón los veteranos de guerra (durante el Rosismo) en sus memorias o relatos autobiográficos --recogida en los expedientes de

filiaciones-- ignoraban la Guerra de Independencia y no se remontaban más allá del nacimiento del Federalismo (1828). Este legítimo interrogante, surgido de la compulsión de documentos originados en los testimonios de protagonistas subalternos (soldados rasos) encontraría una primera respuesta en el achicamiento del espacio identitario, que de una geografía continental y/o virreinal se redujo abruptamente a un espacio meramente Rioplatense y hasta Bonaerense; y una segunda respuesta más obvia en la índole duramente represiva de la época, que entre otros motivos no perdonaba el hecho de que el carismático Juan Manuel de Rosas no hubiera sido partícipe de la épica revolucionaria o independentista. Sin embargo, Salvatore prefiere extender las prácticas represivas a ambos bandos en pugna (Unitarios y Federales), en una suerte de aplicación retrospectiva de la denominada Teoría de los Dos Demonios.

Asimismo, la regresión en la transición histórica habría obedecido también a la preponderancia de las virtudes del localismo, el orden y la jerarquía por sobre las virtudes espartanas y el valor guerrero que prevalecieron como componentes del carisma y como expresión simbólica en tiempos de la denominada revolución de independencia.<sup>6038</sup> Otros autores sostienen la creencia que la anarquía política obedecía a la declinación de la moral pública y al ocaso de la religiosidad popular.<sup>6039</sup> Indudablemente, la expansión de la frontera política (e.g.: la ley electoral de 1821 en Buenos Aires) tiene que haber jugado un rol determinante en esta transición, aunque ésta difícilmente pueda haber compensado la pérdida territorial que significó el desmembramiento virreinal.<sup>6040</sup> El enfrentamiento armado entre coaliciones políticas adversas, donde la amenaza militar del liberalismo unitario, combinado con la amenaza naval europea, habría acrecentado el auge del federalismo --en manos de carismáticos caudillos ruralizados y militarizados-- y el aislamiento o clausura provincial.<sup>6041</sup> Las teorías aislacionistas o inmunizadoras se aplicaban entonces contra el contagio del liberalismo unitario.<sup>6042</sup>

Los obstáculos impuestos al pasaje de las categorías de estamento y de súbdito -- propios del denominado Antiguo Régimen-- a las categorías igualitarias de clase social y ciudadano, propias de un orden modernizante liberal-capitalista, se correspondían con la inercia o persistencia del parlamentarismo premoderno (Cabildos) y de las tradiciones comunitarias, patriarcales, pre-burguesas y pre-republicanas que los procesos inmunizatorios aún no habían podido disolver.<sup>6043</sup> Por otro lado, la inercia de los patrones de producción rural, entraron en conflicto con la rápida recepción de innovaciones tecnológicas (aplicación del salado a la producción de tasajo).<sup>6044</sup> Finalmente, la crisis económica mundial (1825/30) marcó el inicio de la fase de estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev (1820/25 a 1848/52), el apogeo del proteccionismo agrícola inglés (Corn Laws) y la depresión de la industria textil británica.<sup>6045</sup>

## **B-II El análisis de vestigios o supervivencias históricas.**

Para explicar la etapa de la fractura (1827-1852) numerosos historiadores han recurrido al análisis de vestigios o supervivencias históricas de fracturas pre-modernas (genéticas).<sup>6046</sup> El sistema o conjunto de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata estaba constituido por un complejo de cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), cada uno de los cuales contaba con un equilibrio de poder regional propio, todo ello en el contexto de un sistema sub-continental complejo donde interactuaban también el Imperio del Brasil y las nacientes repúblicas del Paraguay, Chile y el Uruguay. Las autoridades gubernativas provinciales de cada uno de estos cuatro

subsistemas políticos exigían una suerte de reconocimiento diplomático de las otras provincias; se negaban a entregar contingentes de soldados a las Provincias Unidas del Río de la Plata, manteniendo sus propios ejércitos y su propia moneda, declarando la guerra e interviniendo en las provincias vecinas; expulsando exilados y sirviendo de anfitriones a los expatriados de otras provincias; adolecían de una anarquía administrativa y monetaria y de una administración de Justicia puramente provincial; la clase artesanal agremiada constituida por pardos operarios de oficio se movilizaba; y las autoridades eclesiásticas se resistían a desamortizar los fondos capellánicos y retenían el poder sobre gran parte de las funciones simbólico-registradoras (nacimientos, matrimonios y defunciones).<sup>6047</sup> En este trabajo, analizaremos el sistema de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata -- análogamente a como Franke (1968) hizo con las ciudades-estado Italianas del Renacimiento-- como si se tratara de un sistema internacional.

En el caso específico del subsistema del Litoral, la ocupación militar de la Banda Oriental por el Imperio Portugués desde 1811 primero, y desde 1816 más luego, había actuado como agente disruptivo, desarticulando el equilibrio del poder en la Cuenca del Plata.<sup>6048</sup> Pero con la Declaración de Independencia del Brasil (Grito de Ipiranga) en 1822, el Ejército de ocupación en la Banda Oriental entró en un proceso de deliberación y anarquía que hizo factible que los Orientales intentaran por vez primera liberarse del yugo Brasileiro.<sup>6049</sup> Para 1825, los Orientales refugiados en la banda occidental del Río de la Plata, con el público apoyo de las Provincias Unidas emprendieron bajo el mando de Juan Antonio Lavalleja la Expedición conocida como de los Treinta y Tres Orientales, la que al cabo de un par de meses convocó la Asamblea Constituyente que instauró el Gobierno de La Florida.<sup>6050</sup> Con el desembarco del “Ejército Republicano” formado con milicias provenientes de todas las provincias se fue desatando la denominada Campaña del Brasil que tras varios hechos de armas culminó con el triunfo militar de Ituzaingó (1827), la actuación diplomática del Ministro Manuel José García en la mesa de negociaciones, la independencia de la República Oriental del Uruguay, la caída del Presidente Rivadavia, y el fracaso de la Convención Constituyente de 1826 por el repudio de las provincias a la Constitución unitaria.<sup>6051</sup>

En el caso específico del subsistema del Norte, los triunfos militares del Gral. José María Paz sobre Facundo Quiroga, en Oncativo y La Tablada (1829), con auxilio de tropas de Salta y Tucumán, sellaron la suerte de los gobernadores federales de Cuyo y Catamarca.<sup>6052</sup> A dichos triunfos le siguieron el interés por concertar Tratados de Paz con las provincias del Litoral y con el Gobernador de Buenos Aires Gral. Viamonte.<sup>6053</sup> Sin embargo, una vez desplazado Viamonte del poder, y con Rosas como Gobernador, el interés por concertar acuerdos de paz con Córdoba se desvanecieron.<sup>6054</sup> En el caso del Litoral, luego de haberse desprendido la Banda Oriental del mismo, se llegó a celebrar en 1831 un acuerdo político conocido como el Pacto Federal. En el subconjunto político Norteño, el desequilibrio económico y político regional afectó a dichas cinco provincias por igual. El partido unitario de Tucumán, el más importante del subsistema político Norteño, cuya hegemonía política era disputada por Córdoba y Buenos Aires, había alcanzado a celebrar un acuerdo político, conocido bajo la denominación de Coalición del Norte,<sup>6055</sup> pero con motivo de la derrota de Famaillá (1840) entró en un proceso de eclipse y colapso. Y el partido unitario de la provincia de Corrientes, la provincia más importante del subsistema político del Litoral, cuya hegemonía política era disputada por Buenos Aires y Montevideo, había alcanzado a celebrar una alianza defensiva y ofensiva con Paraguay.<sup>6056</sup>

### B-III. Justicia carismática e inamovilidad de los jueces.

Uno de los principios fundamentales de la independencia de la justicia, pilar del orden republicano y de la división de poderes, es el respeto debido a la jurisdicción y la inamovilidad de los jueces. Sin embargo, en un régimen de legitimación carismática como el Rosista, el poder de resolución de conflictos tal como el poder inhibitorio, herencia del orden imperial-absolutista español, aún se hallaban subsistentes, aunque ahora asumidos rutinariamente por una justicia carismática. Inhibir consistía en asumir las causas pendientes o, en otras palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior.<sup>6057</sup> En la Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada **avocación**.<sup>6058</sup> Estas instituciones se perpetuaron con ciertos velos o disimulos en la primera mitad del siglo XIX, como por ejemplo en el Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria, duramente criticado por Agustín Francisco Wright en 1838, en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,<sup>6059</sup> así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga.<sup>6060</sup>

### B-IV La gelatinización de la sociedad civil.

A su vez el despotismo porteño se caracterizó no sólo por sus prácticas nepóticas en la Legislatura (Anchorena vs. Rosas) y por su restauración del orden jurídico colonial,<sup>6061</sup> sino por introducirse en las provincias vecinas,<sup>6062</sup> y gelatinizar la sociedad civil al confiscar la propiedad privada de sus opositores. Esta gelatinización de la sociedad civil porteña habría sido una de las causales que precipitó la caída del régimen en la batalla de Caseros (1852). Por el contrario, el menor grado de despotismo y gelatinización de la sociedad civil en la periferia provincial fue en parte lo que le permitió a su elite política perpetuarse.<sup>6063</sup> Asimismo, las denuncias de los **Proscriptos** contra la llamada vindicta pública o escarmiento, que revelaba la tensión existente entre la generalidad de la legislación vigente --pues aún regía la Legislación de Indias-- y la singularidad de los casos históricos concretos, expresada en las prácticas jurídicas, se ejemplificaron en forma patética con el justiciamiento de Camila O'Gorman.<sup>6064</sup>

En ocasión de las guerras de independencia, el propio líder de la resistencia gaucha, Don Martín Miguel de Güemes, pese a sus supuestas diferencias con la elite salteña, le insinuaba al General Manuel Belgrano poner como jefes de las milicias gauchas a "...oficiales hijos de las **familias decentes**".<sup>6065</sup> Más aún, en la correspondencia que existe edita, las referencias al parentesco que Güemes cultivaba con diversos miembros de la elite, al iniciar y cerrar su ocasional correspondencia, son permanentes.<sup>6066</sup>

Durante la contra-ola Rosista no fue necesario restablecer el parlamentarismo pre-moderno (Cabildos),<sup>6067</sup> pues el caudillismo cultivaba un poder tan absoluto, que la facultad de designar los miembros de las Cámaras de Representantes y del Poder Judicial era parte de su patrimonio político.<sup>6068</sup> Por otro lado, a diferencia de la Junta de Mayo, preñada de una profunda tendencia democrática, la cual había adoptado el revolucionario principio de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes",<sup>6069</sup> en este período histórico el parentesco con figuras de la oposición pasó a constituir mas un estigma que un privilegio, o en otras palabras, un mecanismo de exclusión, que sancionaba la responsabilidad clánica haciendo desaparecer la responsabilidad individual.<sup>6070</sup>

Durante el Rosismo, las provincias habían sido gobernadas en gran parte por una extensa red de parentescos. En Salta --correspondiente al subsistema político del Norte, cuya hegemonía política era disputada por Santiago del Estero y Tucumán-- había prevalecido la oligarquía de los Saravia, los Uriburu y los Alemán Tamayo, enfrentados entre sí.<sup>6071</sup> En Mendoza, de los catorce gobernadores que figuran en la Tabla M-II, tres pertenecieron a la familia de los Correas, dos a la de los Ortiz, y tres a la de los Sotomayor. El que había sido Gobernador en 1839 Juan Isidro Maza Sotomayor era primo hermano del que fue Gobernador en 1840 Pedro de Molina Sotomayor; y el que había sido Gobernador en 1837 Eugenio Corvalán Sotomayor era sobrino político del que fue Gobernador en 1833 Pedro José Pelliza Videla. Y en San Juan, correspondiente al subsistema político de Cuyo, donde la hegemonía política era disputada por Mendoza y Córdoba, de los veinte gobernadores que figuran en la Tabla SJ-II dos pertenecieron a la familia de los Albarracín, dos a la de los Laspiur, y dos a la de los Godoy. Se atisbaba también en San Juan una estigmatización de los parientes de Unitarios. El que luego fuera en 1854 Gobernador Coronel José Antonio Durán le había expresado a Juan Manuel de Rosas

"...vásteme solamente decir a V.E. que Don Domingo Soriano, y Don Francisco Sarmiento, son primos hermanos del funesto salvaje unitario Domingo Faustino Sarmiento, así como Don Zacarías Yanis y Don Santiago Lloveras son de los mejores amigos y panegiristas con que aquel traidor cuenta en San Juan".<sup>6072</sup>

Sin embargo, hubo también excepciones a esta cruel costumbre. Durante el gobierno tucumano del General Celedonio Gutiérrez, (alias) "El Peludo", que sucediera en la década del 40 al del caudillo Alejandro Heredia, aquel logró atraer a su gestión al numeroso clan de los Colombres, de conocida trayectoria unitaria, gracias al matrimonio de su hija Zoila Gutiérrez con el Dr. Ezequiel Colombres.<sup>6073</sup>

En esta contra-ola regresiva, que se inició con el rechazo de las Provincias interiores a la Constitución de 1826,<sup>6074</sup> y la consiguiente caída del Presidente Rivadavia (1826) y concluyó definitivamente en Caseros (1852), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, los pactos internacionales e interprovinciales, la censura periodística, la restauración jesuítica (transitoria), el sectarismo religioso, académico y universitario, el exilio, las confiscaciones y las ejecuciones sumarias, alcanzando su paroxismo en el año 40.<sup>6075</sup> Al generalizarse el conflicto, estos necesariamente derivaron en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a favor de la Primer Triple Alianza celebrada en el Cono Sur consiguió derrocar al Rosismo,<sup>6076</sup> aunque no logró consumir la llamada Unidad Nacional, que recién se concretó con la batalla de Pavón.<sup>6077</sup>

Pero la lucha librada en la primera mitad del siglo XIX, por los actores de la luego llamada Organización Nacional, contra la contra-ola regresiva (la anarquía y el caudillismo), fue aparentemente en vano, por cuanto durante la segunda mitad del siglo XIX, también se resucitó en las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata el espíritu anárquico y caudillesco. Durante la hegemonía del estado autocrático y la dominación carismática que se dio en el siglo XIX (1827-1852), la fase de estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev (1820/25-1848/52), combinada con la amenaza militar unitaria y la amenaza naval europea, no hizo más que acentuar las connotaciones autoritarias de dicho régimen.

Al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas regresivas (la violencia y la guerra) en la Argentina han tenido un circuito bien marcado pues han viajado de una provincia a otra sin repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las transiciones u olas regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de contagio o dominó dentro de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que la violencia iniciada en la Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,<sup>6078</sup> y continuada en Buenos Aires con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero prolongado a escala nacional y continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda occidental del Río de la Plata, luego a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos Aires con Cepeda y Pavón, para rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza (1862-63); luego en todo el noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos con Aparicio y López Jordán (1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo con Santa Rosa (1874), para desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en Corrientes con la guerra civil (1878). Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y Los Corrales (1880), para desplazarse a Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) y Uruguay (Revolución del Quebracho, 1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar finalmente en la Revolución del Parque (1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.

### **Capítulo III-A-3**

#### **Retraso cultural relativo en el orden laico-republicano**

##### **Índice**

- C-I Madurez social e intelectual de una elite revolucionaria.
- C-II. Proceso secularizador del conocimiento (1800-1862).
- C-III Brecha científico-educativa (1862-1890)
- C-IV Segregacionismo en los flujos educativos y culturales (1890-1912)

Habiendo estudiado en los capítulos anteriores los procesos de legitimación tradicional y carismática a partir del colapso imperial, en este capítulo dedicado a investigar el orden laico-republicano, trato de encuadrar el retraso cultural del Río de la Plata en cuatro apartados consecutivos: la madurez social e intelectual de una elite revolucionaria, el proceso secularizador del conocimiento, la brecha científico-educativa, y el segregacionismo en los flujos educativos y culturales.

#### **C-I Madurez social e intelectual de una elite revolucionaria.**

El verdadero sustrato de la transición del orden imperial-absolutista al sistema modernizante del orden nacional-republicano habría consistido en la articulación interna

de una auténtica esfera pública. Sin embargo, la crisis política o de las elites que concibieron la denominada independencia fue interpretada por Kossok (1959, 1974), Romano (1966), Carmagnani (1976) y Chiaramonte (1982, 1989) como consecuencia exclusiva de una coyuntura externa. Este último autor opina que en el Virreinato del Río de la Plata la clase o elite que concibió la independencia carecía —al momento de protagonizar dicho fenómeno— de madurez social e intelectual.<sup>6079</sup> El “salto” o ruptura entre un pensamiento adherido a las formas tradicionales hispánicas (escolástica y barroco) y el pensamiento Ilustrado de la independencia (enciclopedista) se explicaría, según Chiaramonte, como efecto de las presiones ejercidas por la coyuntura internacional.<sup>6080</sup> Esta explicación correría el riesgo de estar reincidiendo en la remanida tesis de DePauw acerca de la inferioridad del hombre americano.<sup>6081</sup>

Más aún, la tesis de Chiaramonte supone --según Fernández de Amicarelli y Ciriza (1990)-- un esquema demasiado simplista, cuando en realidad dicho “salto” habría sido la expresión de una prolongada acumulación de contradicciones (espirituales, ideológicas, políticas, sociales, económicas, burocráticas, militares, eclesiásticas, etc.) en el interior mismo de la sociedad colonial.<sup>6082</sup> La historia política lograría entonces integrarse cuando las historia de las contradicciones puramente políticas se empalme a la historia de las contradicciones económicas, sociales y culturales. De ahí que, según Amicarelli y Ciriza, no es posible negar la relación entre movimientos precursores de la independencia (rebeliones comuneras de Paraguay [1721-35], Corrientes [1764], y Traslasierra [1774] y rebeliones de originarios en Chile [Mapuches] y el Alto Perú [1782]) con el proceso de independencia propiamente dicha (1810). La tesis de Chiaramonte no podría explicar, entre otros muchos problemas, la pregunta que tan lúcidamente se formula Izard (1992) acerca de porqué varias juntas americanas rechazaron tan decidida y simultáneamente la regencia gaditana, o la asombrosa sincronía con que la coyuntura napoleónica operó como un catalizador que fue aprovechado simultáneamente por las elites de todas las colonias españolas.<sup>6083</sup> Esta simultaneidad no tendría otra explicación que la de una profunda madurez social e intelectual.

Asimismo, llama la atención cómo Chiaramonte, quien reconoce —al estudiar la vida intelectual del canónigo Juan Baltasar Maziel— que el derecho era en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII “...campo crucial de las disputas sobre el regalismo”,<sup>6084</sup> no haya investigado la serie tribunalicia de la División Colonia existente en el Archivo General de la Nación, o los libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba, fuentes primarias inéditas donde habría podido compulsar innumerables escritos de la elite intelectual de entonces.<sup>6085</sup> Cabe finalmente acotar que del medio centenar de documentos reeditados por Chiaramonte a partir de las Asambleas Constituyentes publicadas por Emilio Ravignani no existe uno sólo que abone su hipótesis de la inmadurez de la elite criolla rioplatense, así como tampoco hay texto alguno que haya sido descubierto indagando la riquísima cantera documental primaria existente en los Archivos de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta o Sucre.

Entre otros muchos escritos, pueden consultarse los alegatos del doctor Juan Manuel de Labardén contra el colonialismo,<sup>6086</sup> el del doctor Pedro Medrano, de 1790, sobre la tiranía y la libertad;<sup>6087</sup> el de Tomás Valle en 1795 como defensor de dos franceses en la causa criminal por delito de sedición popular;<sup>6088</sup> los del Protector de Naturales del Tucumán Salvador Alberdi Egaña,<sup>6089</sup> de 1799, contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, por maltrato a los indios;<sup>6090</sup> los del doctor Mariano Pérez de Saravia (graduado en Santiago de Chile) ante la Real Audiencia

de Buenos Aires en defensa de: a) los reos de Oruro,<sup>6091</sup> b) el comerciante Tomás Antonio Romero, acusado de contrabando,<sup>6092</sup> y c) el bloque del Cabildo de Córdoba liderado por el doctor Gregorio Funes, y contra los cabildantes que renunciaron al fuero capitular sometiéndose a la jurisdicción eclesiástica;<sup>6093</sup> el del doctor Miguel García de la Huerta, de 1816, contra la aplicación de las leyes del mayorazgo en las capellanías laicales; los del Lic. Fernando Pérez de Bulnes y del doctor José Francisco de Acosta, de 1799, contra el clericalismo vigente en Córdoba y Buenos Aires, para que las capellanías no sirviesen a los curas ya consagrados y para solemnizar oratorios y días de precepto sino para satisfacer el deseo de los hijos y deudos de estudiar y alcanzar las órdenes sagradas; los de Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y Mariano Moreno (los tres graduados en Charcas), contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre que defendía el doctor Alexo Castex;<sup>6094</sup> los del doctor Fernando de Arce y Bustillos en 1776, de Nicolás García Guillado en 1778, y de Carlos Estela en 1782, contra el nepotismo vigente en el Cabildo de Córdoba;<sup>6095</sup> los del doctor Pedro Arias Velásquez contra el nepotismo del teniente asesor de Salta José de Medeyros; el del doctor Antonio Ezquerreneá (graduado en Charcas en 1792) contra el nepotismo de las elecciones capitulares de Catamarca, acontecidas en 1810; y los escritos de los doctores Juan José Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerreneá, contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo sanjuanino, defendidos también por el doctor Alexo Castex; el del teniente coronel y comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza don Miguel Télles Meneses, contra el patrimonialismo de los cabildantes propietarios de Mendoza;<sup>6096</sup> el del doctor Mariano Moreno, firmado en 1810, contra la extralimitación ejecutiva del poder jurisdiccional de los alcaldes;<sup>6097</sup> el de Juan Bautista de Isasi, de 1796, contra el fuero exclusivo de los milicianos;<sup>6098</sup> el del Deán Gregorio Funes, en representación del obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso y Peralta, contra el ceremonial de visitas con capa magna impuesto por el gobernador de Córdoba Rafael de Sobremonte;<sup>6099</sup> el de 1794 del doctor José Vicente Carrancio sobre los recursos de fuerza;<sup>6100</sup> el del doctor Mariano Irigoyen, de fines del siglo XVIII, contra el latifundismo de los terratenientes entrerrianos; el del doctor Simón García de Cossio sobre que las cárceles no deben ser para castigo de los presos;<sup>6101</sup> y las del doctor Antonio Ezquerreneá contra el castigo de niños; y sobre el tratamiento honorífico de don.<sup>6102</sup>

## **C-II. Proceso secularizador del conocimiento (1800-1862).**

En medio de la quiebra del orden imperial-absolutista, de la ruptura de los sub-órdenes patriarcal, patrimonial, estamental, señorial, esclavista, corporativo, regalista y nepótico, de la disolución del monopolio mercantil español, de la fractura de la legitimidad virreinal y de la emergencia de políticas librecambistas hegemonizadas por el naciente imperialismo Británico, la lucha nacional-emancipatoria --alimentada con el repudio al holocausto indígena denunciado por la Ilustración (Voltaire)-- estuvo íntimamente vinculada a innovadoras y secularizadoras instituciones de control simbólico, cuya recepción aconteció obviamente en forma tardía.<sup>6103</sup> Amén de la recepción de la literatura enciclopédica, en el Río de la Plata se cultivaron múltiples tertulias y se divulgaron sermones, evangelios y catecismos patrióticos, y también ciertos imaginarios (tradiciones y leyendas), algunos de los cuales pusieron el énfasis en el pasado incaico y en los mitos bíblicos y griegos clásicos, como el mencionado mito hesiódico de las razas.<sup>6104</sup> Este último mito, adaptado al mundo rioplatense, habría

consistido en una raza mestiza, producto de la mezcla entre conquistadores e indígenas, equivalente a la raza de plata de dicho mito hesiódico, que en nuestro caso sería la criolla enfrentada entonces a los peninsulares que arribaron con la recolonización Borbónica dieciochesca.<sup>6105</sup>

Del mismo modo se puso énfasis en nuevas territorializaciones, corporizadas en los separatismos Rioplatense, Altoperuano, Paraguayo y Uruguayo, los cuatro desprendidos del seno mismo de los antiguos Virreinos del Perú (1544-1776) y del Río de la Plata (1776-1810), y más luego --con el derrumbe del imperio español-- en la balcanización de las Gobernaciones-Intendencias y los nuevos separatismos correspondientes a cada una de las provincias. Estas últimas vinieron a constituir la nacionalidad Argentina y fueron también desgajamientos del propio seno del Virreinato del Río de la Plata (1816).<sup>6106</sup> Estas balcanizaciones privaron a las Provincias Unidas del Río de la Plata (uno de cuyos desprendimientos fue conocido después como Argentina), del contacto con los dos centros étnicos vernáculos de más intensa identidad civilizatoria pre-moderna, las civilizaciones quechua y guaraníca, lo cual provocaría en el futuro mediato trágicos y sangrientos episodios.<sup>6107</sup>

Estas nuevas instituciones crecientemente secularizadas que vinieron a otorgar legitimidad al accionar revolucionario estuvieron diseñadas a imagen de la Francia revolucionaria y operaron como una transición desde los repositorios y colecciones reales hasta las instituciones públicas nacionales (Biblioteca Nacional, Museo Público de Buenos Aires, Academia de Medicina, Registro Oficial, Dirección de Geodesia y Catastro).<sup>6108</sup> Tras el colapso de la metrópoli colonial española, la implosión o desmembramiento del espacio imperial y la fractura de las legitimidades virreinales e intendenciales, y tras un prolongado enfrentamiento con el Imperio del Brasil (1816-1827), que separó a ambas bandas del Río de la Plata, se desató una larga guerra civil y un cesarismo con connotaciones despóticas cuasi-orientales (1828-1852), que fue alimentado por la hegemonía escolástica-jesuitica de la Santa Alianza (Canciller Metternich). Esta hegemonía estuvo en el Río de la Plata inspirada en el pensamiento de Bernardo Berro, que retrotrajo la cultura Rioplatense a los esquemas simbólicos y jurídicos del absolutismo escolástico Habsburgo. Las postergadas y reprimidas casas de altos estudios se subordinaron a la creciente competencia con la enseñanza privada; y la elite académica nucleada en la célebre Asociación de Mayo, liderada por Estéban Echeverría y Florencio Varela (Generación de 1837), se vio constreñida a exilarse en Montevideo y Santiago de Chile.<sup>6109</sup> Superado este trágico contexto así como las amenazas colonizadoras anglo-francesas (1839-1845), contemporáneas de la conquista de Argelia, Argentina fue emergiendo lentamente como estado-nación (1862-1880) poniendo el eje de su interés en la tercera etapa de un antiguo proceso de secularización, que se había iniciado con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y continuado con las Reformas Eclesiásticas Rivadavianas (1822-23), y que comprendía la escuela laica, la educación media, la universidad pública (UNLP, 1886) y los organismos de ciencia y cultura (Academias, Museos, Observatorios Astronómicos, Bibliotecas, Laboratorios, Teatros, Archivos), los cuales monopolizaron el apego por una política cultural y universitaria francamente modernizadora.<sup>6110</sup>

### **C-III Brecha científico-educativa (1862-1890)**

En los estertores de la modernidad absolutista (Ilustración), cuando el mundo presenciaba una asombrosa fragmentación de la ciencia y una estimulante humanización romántico-liberal, nutrida por el utilitarismo Benthamista, el saint-simonismo y el spencerismo; y en él prevalecía un capitalismo industrial tardío (Prusia, Italia), una acendrada estratificación en clases sociales, una burocratización republicana (división de poderes), y una escolaridad pública, laica, gratuita, universal y obligatoria (Jules Ferry en Francia); y cuando las potencias imperiales (Gran Bretaña y Francia) se disputaban la partición de Asia, África y el Medio Oriente, los Estados Unidos se debatían en una cruenta Guerra Civil, y en el continente Latinoamericano se libraba la resistencia contra la Intervención Francesa (México, 1865), y las Guerras del Paraguay (1864) y del Pacífico (1879), todas ellas alimentadas por previas balcanizaciones y despojos territoriales, en la Argentina (Organización Nacional, 1862-1880), luego de una profunda crisis de legitimación y gobernabilidad, se impusieron múltiples rupturas y flujos históricos.

Confirmando la intervención del mito étnico (o criollo) como necesario elemento dinámico explicativo de la emancipación americana, tras décadas de sangrienta lucha cobró fuerza primero una voluntad nacionalista por sobre la mera voluntad confederativa (en provincias o fragmentos de estado, Pavón, 1862). Veinte años más tarde se impuso una reivindicación federalizadora de la ciudad y aduana de Buenos Aires (Los Corrales, 1880). Sobre la base de estos logros político-simbólicos, y en menoscabo de concepciones patrimonial-estatistas en materia económica y de regímenes clericales y privatistas en materia educativa (Bossuet-Metternich-Berro), se inauguraron políticas legitimadoras en materia de liberalismo económico, modernidad cultural (absolutización, secularización, laicización y codificación civil, educativa y profesional), progreso material (nacionalización de la Aduana y standardización del transporte, comunicaciones e imprenta), anexionismo territorial y su racialización biológica, concretada en la limpieza étnica o genocidio indígena (Conquista del Chaco y del Desierto).<sup>611</sup> No obstante el social-darwinismo vigente, es preciso aclarar que en el mundo indígena las Misiones religiosas de Franciscanos y Salesianos lograron encarar políticas evangelizadoras o catequizadoras. Sin embargo, estas últimas no pudieron disfrazar sus fines culturalmente "civilizatorios".<sup>612</sup>

Para ese entonces, en Alemania, influidos por la pedagogía positivista (Comtiana) y la lingüística comparada (Humboldt), se rompió con el paradigma pedagógico profesionalizante o carrerista de la universidad Napoleónica (Cousin), y se introdujo la noción de la unidad de la investigación y la docencia, como núcleo central de la universidad moderna, enemiga de las escuelas superiores y especiales y de las profesiones liberales, noción que por su precisión y capacidad de especialización modeló en Alemania las relaciones entre el sistema científico y el estado.<sup>613</sup> Pero en Argentina, en medio de la hegemonía cultural francesa y la persistencia de las pautas de la modernidad absolutista, herederas del imperialismo cultural español (conquista y colonización barroco-renacentistas), se formuló como parte de un innovador programa

político la formación de una identidad cultural nacional, cuyo contenido no pretendía exceder las fronteras del espacio nacional, para lo cual se fue imponiendo un control simbólico-ritual (cancionero y calendario de efemérides nacionales), una poesía épica fundacional (Santos Vega, Martín Fierro), un arte plástico nacional y moderno (Blanes, Della Valle), una historiografía nacional positivista (fundada en documentación y archivos), y una política secularizadora (laica).<sup>6114</sup> Estas últimas vinieron a desplazar el entramado de la codificación legal hegemónica y a laicizar la cultura y la sociedad civil vernáculas heredadas del colonialismo español, tales como la desamortización de capellanías y censos eclesiásticos y la nacionalización del Registro Civil; y a diversificar la acumulación institucional de capital social y cultural, mediante la fundación de instituciones de cultura laica, tales como el Observatorio Astronómico de Córdoba (1871), la Sociedad Científica Argentina (1872), las Facultades de Ciencias y de Medicina (1865, 1877), los Colegios Nacionales, el Colegio Militar (1869), la Escuela Naval, las instituciones mineralógicas y museológicas (herbarios y Jardines Zoológico y Botánico), las instituciones artísticas (Sociedad Estímulo de Bellas Artes, 1878), el Registro Estadístico, el Consejo Nacional de Educación (1884), los colegios profesionales (Sociedad Central de Arquitectos, 1886), y numerosas instituciones científicas (academias, bibliotecas, laboratorios, y archivos).<sup>6115</sup> Asimismo, en materia económica se impulsaron políticas de inversiones y transferencia tecnológica, unas referidas a la ganadería, las que vinieron a refinar genéticamente los planteles ganaderos (ovinos y bovinos), y otras que incorporaron a la estructura tecnológica, primero frigoríficos y ferrocarriles, y luego el telégrafo y la electricidad.

La inserción de estas recodificaciones (textos, discursos, políticas y normas modernizadoras) tuvieron lugar sobre segmentos burocráticos donde se dirimían las oposiciones entre individualismo y comunitarismo, capitalismo y feudalismo, republicanismo y absolutismo, modernidad laica y modernidad erasmiana, y nacionalismo y confederacionismo, las cuales vinieron a reiterar con más contenido y fundamentos los frustrados intentos y proyectos ensayados tibiamente primero por las Reformas Borbónicas (1784-88), y luego por las Reformas Rivadavianas (1822-25) y la Generación de 1837, y donde a imagen y semejanza de Europa, los principios filosóficos, políticos y económicos del desarrollo mercantil, el disenso religioso, la unidad monetaria (moneda nacional), la separación de la iglesia del estado, las libertades académicas, el laicismo escolar, y el monopolio de la violencia física legítima (ejército nacional), la salubridad (Obras Sanitarias) y el empadronamiento (Registro Civil, Censos Nacionales), devinieron en pre-requisitos inexcusables de la cultura modernizante republicana.<sup>6116</sup> Estas luchas fueron reproducidas y alentadas con el propósito de acortar la brecha científico-educativa o superar la subordinación humanística y científica en la estratificación geopolítica de la investigación y el conocimiento, que distanciaba la periferia americana del creciente imperialismo cultural europeo.<sup>6117</sup> En la pugna por la hegemonía discursiva, las lenguas imperiales y la historiografía se disputaban los territorios académicos.<sup>6118</sup> Y en la pugna por el ordenamiento de las reminiscencias del pasado también la numismática, la cartografía y la iconografía se disputaban las instituciones culturales.<sup>6119</sup> Más tarde, como en la misma Europa, la diseminación del laicismo, el ateísmo y el anticlericalismo en el Río de la Plata, fue el resultado de procesos radicalizados de secularización, de escepticismo religioso y de agnosticismo filosófico.<sup>6120</sup> Y la diseminación de concepciones racializadoras y biologizantes fue el resultado de la importación de teorías radicalizadas de etnicización.<sup>6121</sup> No obstante el esfuerzo prodigado por acortar la brecha científico-educativa con reformas modernizadoras de índole republicana, para que una

transformación social y política tenga posibilidades de vencer en la larga duración habría debido alcanzar una concepción homogénea del tiempo y del espacio --del tiempo social y del religioso, del espacio sagrado y del profano-- que excediera las fronteras geográficas del estado-nación impuestas por la revolución de independencia.

Sin embargo, a pesar de los procesos expropiadores y secularizadores de las esferas de competencia provincial y eclesiástica, ni la Iglesia ni las jurisdicciones provinciales habían perdido el control simbólico de la educación, ni la religión había dejado de pertenecer al capital o patrimonio cultural.<sup>6122</sup> Como neta expresión de esta monopolización estatal de la educación superior y clara disparidad con la universidad colonial, la Generación del 80 --que constituía una nueva formación intelectual emergente-- había dictado la Ley Avellaneda (Ley 1597), donde se fijó el principio republicano de la exclusiva designación por concurso u oposición de los integrantes del cuerpo docente.<sup>6123</sup> Y como reflejo de la impresionante expansión agropecuaria se fundaron nuevas universidades como las de La Plata (1886) y Santa Fé (1889), donde también se registró la proliferación de nuevos saberes (arqueología, antropología, paleontología) e inéditas rivalidades intra-académicas (Burmeister vs. Ameghino fundado en Darwin; y Groussac vs. Levene-Ravignani fundados en Lamprecht), inter-países limítrofes (Argentina-Chile) e inter-imperiales (Franco-Germana), por el control de una precoz investigación científica en los campos de la astronomía y la antropología, que luego se prolongaron con la creación de diversas asociaciones culturales (fundación de la Alianza Francesa en 1893, el Instituto Cultural Argentino-Norteamericano (ICANA) en 1927, y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa en 1928).<sup>6124</sup> En este segundo período fundacional de la educación superior y del sistema científico argentino, el conflicto se había desplazado de la disuasoria represión inquisitorial y las pugnas ceremoniales y corporativas del período colonial, y las rivalidades ideológicas prevalecientes durante la guerra civil, hacia impugnaciones de la estructura de poder académico, que se manifestaban esencialmente en las incompatibilidades entre cargos y cátedras universitarias y cargos ministeriales y parlamentarios.<sup>6125</sup> En esa época, aunque criticado e impugnado, era común que existieran Rectores de universidades que fueren simultáneamente Senadores (Nicolás Avellaneda, Joaquín V. González) o Decanos universitarios que oficiaran de Diputados (José Arce).

#### **C-IV Segregacionismo en los flujos educativos y culturales (1890-1912)**

Y en medio de un mundo envuelto en la crisis de la modernidad absolutista (Ilustración), sustituida por la filosofía nihilista de la desilusión y el desencanto (Nietzsche), y en los inicios de una nueva modernidad --cuando ocurría una segunda revolución industrial (Fordismo), una agudización de la competición colonialista, la derrota del Zar de Rusia ante el pujante y antes periférico Imperio Japonés (1905) y prevalecía un capitalismo financiero, una burocratización democrático-parlamentaria y el mito positivista de un progreso infinito-- Argentina se debatía en las secuelas de una profunda crisis de legitimación (Revoluciones de 1890 y 1905), con el sistemático fraude electoral, y la imposición de las políticas capituladoras del Acuerdo Roca-Mitre (1891), del Patrón Oro (1903-1914) y de las leyes represivas contra los inmigrantes (Ley de Residencia de 1902 o expulsión de extranjeros "indeseables" impulsada por el

Senador Miguel Cané). Sin embargo, esta cruel y amarga realidad se había mediatizado merced a la persistencia de las pautas culturales de la modernidad absolutista (Ilustración), la ideología del crisol de razas (mestizaje y mulataje), la masiva inmigración europea (ruso-judía, española e italiana), seducida por el mito de "...hacer la América", la armonía de límites fronterizos con Chile (Abrazo del Estrecho, 1901) y el proceso de ruptura que significó la sobrecodificación del capital simbólico, expresado en una creciente fragmentación disciplinar y diversificación profesional, que inauguró nuevas carreras profesionales (militares, periodistas), universitarias (ingeniería) y científicas (paleontología, etnografía, filología, pedagogía) y donde nuevas y numerosas instituciones, construidas a imagen y semejanza de la universidad Humboldtiana, aseguraban la legitimidad de los segmentos institucionales más progresistas.<sup>6126</sup>

Al compás de la formación del estado y sus universidades y del desarrollo del mercado de servicios profesionales, numerosos egresados de carreras universitarias se fueron diferenciando de los integrantes de otras ocupaciones liberales al construir su identidad y los valores de colegialidad agremiándose en colegios profesionales (la Sociedad Central de Arquitectos en 1886, la Asociación Médica Argentina [AMA] en 1891, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas en 1891, el Centro Argentino de Ingenieros [CAI] en 1895, el Colegio de Escribanos en 1897 y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en 1913).<sup>6127</sup> Pero en la AMA, en oportunidad de su fundación, se debatía si entre sus tareas centrales dicho colegio profesional debía perseguir objetivos puramente académicos o tareas meramente gremiales. En el primer caso, mediante estos colegios de graduados, las profesiones debían estar en condiciones de regular el conocimiento y las habilidades sobre las que pretendía ejercer jurisdicción. Es por ello que, según Freidson (1994), los colegios profesionales necesitan controlar las instituciones educativas en que dicho preciso entrenamiento tiene lugar.<sup>6128</sup> Y en el segundo caso, las profesiones debían estar en condiciones de controlar la selección y el entrenamiento de sus integrantes, incentivando así su exclusiva vocación carrerista. En muchos casos, dicha vocación estaba condicionada por el entorno familiar, al extremo de entablar verdaderas dinastías profesionales.<sup>6129</sup>

El increíble desarrollo de nuevas comunidades migratorias, prolongadas por sus respectivas asociaciones mutuales, laborales y deportivas (que fueron alimentando la formación de una sociedad de clases y paralelamente eclipsando la importancia relativa de las elites y campesinados autóctonos y mestizos); nuevas codificaciones y legitimaciones institucionales (periodismo profesional, registro de la propiedad, reclutamiento militar, control estadístico), apuntaladas con la transformación de las políticas urbanizadoras y del periodismo escrito y con misiones militares extranjeras dispuestas a instituir nuevos modelos de organización y conducta militar; nuevas territorializaciones (redes ferroviarias, de salubridad y de electricidad e industria azucarera) apoyadas en los capitales y tecnologías inglesa y francesa; y el descubrimiento y explotación de nuevos recursos energéticos (petróleo en la Patagonia en 1905), se correspondió con la fundación de numerosas instituciones.<sup>6130</sup> Estas nuevas instituciones fueron la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), la Chevra Kedusha, embrión de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1894; la Dante Alighieri en 1896; el Centro Gallego en 1907; la Escuela Superior de Guerra en 1900; la Dirección General de Estadística en 1894; la Dirección de Parques Nacionales en 1903; la Universidad de Tucumán en 1914, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 1913, y las Escuelas Nacionales conocidas como Escuelas Láinez (Ley 4.874 o Ley Láinez) en 1905.<sup>6131</sup> También las réplicas a las crisis engendradas por la creciente

amenaza anarco-sindicalista de la FORA, y las producidas por las pestes y las epidemias, se expresaron en instituciones como el Servicio Militar Obligatorio (Ley Riccheri) y el Instituto Bacteriológico, más luego conocido como el Instituto Malbrán. Las respuestas a la oposición entre una cultura de elite o alta cultura y una cultura popular o baja cultura buscaron una síntesis en los intentos por fundar una cultura nacional, manifestada con la creación de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1905, la inauguración del Teatro Colón en 1908; y su Escuela de Arte Lírico y Escénico, estrenada en 1924 (luego devenido Conservatorio Nacional); la creación de la Sociedad Nacional de Música (1915-1930); la apertura de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, inaugurada en 1914 (luego devenida Escuela Nacional de Bellas Artes), y la reivindicación de un arte nacional, expresado primero en un canto y una danza popular, luego en un teatro nacional y finalmente en un cine nacional.<sup>6132</sup>

En un comienzo, durante la segunda mitad del siglo XIX, el epicentro del conflicto político se centró en la educación pública, universal y obligatoria, para luego extenderse a comienzos del siglo XX a las luchas por la neutralidad diplomática en la Gran Guerra (1914) y por la ciudadanización mediante el sufragio secreto, universal y obligatorio; y a mediados del siglo a la brega por el desarrollo de un sistema científico nacional.<sup>6133</sup> A los efectos de desplazar la presión demográfica que se cernía sobre las instituciones universitarias, tanto el Ministro Manuel Pizarro en 1881 como Juan A. García en 1889 tramaron infructuosamente la estratificación de la población estudiantil secundaria mediante el acceso diferencial a curriculas diversificadas o flujos educativos segregados, vías muertas a los efectos del ascenso social, lográndolo Osvaldo Magnasco en 1898, al crear la Escuela Industrial de la Nación, luego Instituto Otto Krause (1899); y en 1904 el Seminario Pedagógico (luego Instituto Superior del Profesorado), y finalmente reintentarlo formalmente Carlos Saavedra Lamas en 1915, con la colaboración del pedagogo Víctor Mercante.<sup>6134</sup> A partir de la ampliación de los derechos cívicos (Ley Sáenz Peña, 1912), el Ministro José S. Salinas derogó la reforma educacional segregacionista impulsada por Saavedra Lamas (1916). Este énfasis en flujos educativos segregados generó un intenso debate acerca de la verdadera misión de la universidad y más específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras, recientemente inaugurada en Buenos Aires. El debate se circunscribió a la oposición entre aquellos que insistían en la necesidad de hacer eje en las demandas pedagógicas para proveer de docentes al creciente mercado educativo, y quienes como Miguel Cané ex embajador ante la Corte Imperial de Viena y el joven intelectual germanófilo Ernesto Quesada --fundados en la experiencia alemana (debate Schelling-Fichte)-- sostenían que el objeto de las casas de altos estudios debía consistir en la investigación y en la formación de las elites dirigentes.<sup>6135</sup>

Como elemento dinamizador de las rupturas históricas tuvo lugar la intervención de un mito redentorista y mesiánico personificado en la figura carismática de Hipólito Yrigoyen, quien persiguiendo objetivos trascendentales y no sólo seculares y fundado en principios deístas (Krausismo) --en las antípodas del positivismo agnóstico predominante-- pregonaba un discurso reparador de conductas y virtudes.<sup>6136</sup> Este mito providencialista estuvo alimentado por uno de los procesos inmigratorios más masivos jamás experimentados en la historia moderna, el cual en un lapso muy breve de tiempo alcanzó a impulsar sendos procesos de legitimación, de secularización y democratización.<sup>6137</sup>

## **Epilogo Sección III-A**

En esta sección, donde estudiamos las legitimaciones y el atraso cultural a partir del colapso imperial, encontramos que al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas regresivas (la violencia y la guerra) han tenido un circuito bien marcado pues han viajado de una provincia a otra sin repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las transiciones u olas regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de contagio o dominó dentro de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que la violencia iniciada en la Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,<sup>6138</sup> y continuada en Buenos Aires con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero prolongado a escala nacional y continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda occidental del Río de la Plata, luego a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos Aires con Cepeda y Pavón, para rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza (1862-63); luego en todo el noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos con Aparicio y López Jordán (1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo con Santa Rosa (1874), para desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en Corrientes con la guerra civil (1878). Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y Los Corrales (1880), para desplazarse a Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) y Uruguay (Revolución del Quebracho, 1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar finalmente en la Revolución del Parque (1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.

## **Sección III-B Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo**

A mayor grado de distancia y espaciamiento en las rutas de peregrinación de una sociedad determinada menor es la capacidad de cohesionar los espacios y menor el grado de legitimidad del régimen político correspondiente.

Habiendo estudiado en la sección anterior las legitimaciones tradicionales, legales y carismáticas en el contexto del colapso imperial, en esta segunda sección, dedicada a investigar las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, trato en tres capítulos consecutivos: las rutas de peregrinación, la expansión agropecuaria y latifundio en la provincia de Buenos Aires (1820-1852), y la distribución de la tierra de frontera en la república oligárquica (1852-1890).

## Capítulo III-B-4

### **Rutas de peregrinación en la transición del orden absolutista al orden republicano**

#### **Introducción del capítulo III-B-4**

Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto político organizado.<sup>6139</sup> En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad de las estructuras del imperial-absolutismo (genéticas), y del republicanismo (ideológicas, políticas, económicas y sociales), es decir al hecho de que ciertas líneas de fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia con diversos grados de intensidad.<sup>6140</sup>

Al haberse visualizado la representación política, en lo que iba de los siglos XVIII y XIX, en términos geográficos o territoriales y no demográficos o poblacionales, las elites se fueron polarizando regionalmente.<sup>6141</sup> Según Anderson (1983), las rutas de peregrinación y las fronteras geográficas en las naciones-estado poseían un sentido drásticamente diferente de la que poseían en el mundo imperial-absolutista. Para Anderson existían peregrinaciones no sólo religiosas, sino también educativas, comerciales y administrativas. En el Río de la Plata la ruta del comercio vinculaba los puertos de España con los de África occidental y la costa americana. En el hinterland americano esa ruta articulaba diversos polos de producción y administración y se abría en abanico en tres circuitos o carreras distintas: las que por un lado unían el puerto de Buenos Aires con el Paraguay, y las que por otro lado lo ligaban con el Alto Perú y Chile.

Según Guerra y Lempérière (1998), los lugares de la política en el mundo colonial español eran las ciudades, las villas y los pueblos de indios.<sup>6142</sup> Estos lugares constituían un sistema jerarquizado de urbes cada una de las cuales estaba conectada reticularmente con el resto de las urbes que comprendían su hinterland. Las rutas comerciales eran a su vez escoltadas por peregrinaciones educativas compuestas por los hijos de las elites provinciales que concurrían a los establecimientos docentes de Charcas, Córdoba y Santiago de Chile; y por rutas militares, para reprimir las rebeliones de vecinos alzados (Comuneros del Paraguay) o de naturales insurrectos (Tupac Amaru y Pueblos Guaraníes). Las políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782) desestructuraron las relaciones que mantenían las ciudades y las provincias entre sí.<sup>6143</sup> Los patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas, y las elites de las provincias más antiguas se sentían amenazadas por las elites de las nuevas Gobernaciones-Intendencias.

Con el colapso del mundo imperial-absolutista las rutas y peregrinaciones alteraron radicalmente su naturaleza. La carrera del Alto Perú se obturó por la guerra y la ocupación realista, y la del Paraguay por las políticas aislacionistas de los primeros gobiernos patrios.<sup>6144</sup> El Cabildo de Luján adquirió en la provincia de Buenos Aires, durante la anarquía del año 20, un protagonismo inesperado, por cuanto fue el lugar predilecto para que las milicias eligieran gobernadores.<sup>6145</sup> De todos modos se intentaron rutas de peregrinación militares, algunas victoriosas y otras malogradas. Las políticas

nacionalizadoras implementadas luego de Pavón (1862) también desestructuraron las relaciones que mantenían las provincias entre sí.<sup>6146</sup> Las élites de las provincias más antiguas se sentían amenazadas por las élites de las nuevas provincias o territorios nacionales provincializados.<sup>6147</sup> Esta desestructuración afectó en forma desigual a cada provincia, repercutiendo en las diferentes reacciones que estas tuvieron frente a las políticas centrales.

En este contexto teórico se fueron inscribiendo también las políticas respecto a numerosos rubros de la realidad cotidiana: la manipulación del transporte, las comunicaciones, los procesos educativos, los recursos económicos (hídricos),<sup>6148</sup> y la diagramación del correo y de las redes ferroviarias.<sup>6149</sup> El desarrollo de los planes ferroviarios y su diagramación en el terreno estuvo íntimamente vinculado a las luchas entre intereses y facciones políticas regionales. Respecto a las obras de tendido ferroviario, en el norte Argentino, el Diputado Provincial de Salta Marcos Figueroa,<sup>6150</sup> le escribía a Roca que

"...es de mi deber hacerte saber que la Provincia en masa si bien apetece esta obra es en el concepto de que la vía que debe traer es por el Valle de Lerma, pasando a Jujuy directamente por Salta, que de no ser así protestan todos de semejante ferrocarril, desde que no venga a beneficiar la parte más rica de la provincia, y aproximar a la vía los ricos Departamentos de los Valles Calchaquíes".<sup>6151</sup>

Si por el contrario, se trazaba la vía por Cobos o Jujuy, con ramal a Salta, Figueroa concluía que "...quedaremos reducidos al ostracismo sin esperanzas ni porvenir de ningún género".<sup>6152</sup> Para Enero de 1884, el Presidente de la Corte de Justicia de Salta Dr. Ezequiel M. Gallo felicitaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza porque "...como buen salteño es el defensor de los intereses de esta provincia al sostener la traza del camino de fierro por el Valle de Lerma en su prolongación a Jujuy".<sup>6153</sup> También, a juicio de Félix M. Saravia, Plaza era uno

"...de los candidatos simpáticos y que se ha hecho acreedor al aprecio y cariño de los Salteños, porque se sabe que defendió ardientemente la cuestión traza del ferrocarril por el Valle de Lerma a Salta y Jujuy en el Gabinete y por otros mil títulos".<sup>6154</sup>

Respecto al proyecto de prolongación de las vías férreas de Sunchales a Santiago del Estero y Tucumán, éste fue presentado por el Presidente Juárez Celman al Congreso y fue declarado Ley gracias a haber seguido el Ing. Guillermo White el consejo de Juárez de no pedir garantía. De haber pedido garantía, el rechazo hubiera sido seguro. El Gobernador de Santa Fé

"...había hecho trabajos eficaces en contra, pues quería prolongar él al mismo punto su ferrocarril de trocha angosta que se encuentra actualmente en la Colonia Rafaela o San Cristóbal".<sup>6155</sup>

Se argumentaba además "...la competencia ruinosa que con él se haría al Central Norte de la Nación, en lo que realmente hay algo de verdad".<sup>6156</sup> También era motivo de disputa la localización geográfica de los talleres ferroviarios, centros concentradores de peonadas que servían de fuerza de choque en las pujas electorales. El Dr. J. M. Astigueta había iniciado trabajos para que dichos talleres se trasladaran de Córdoba a Tucumán. A ello agregaba el Gobernador Domingo Martínez Muñecas,<sup>6157</sup> que convenía también

trasladar la administración de la vía misma. Muñecas sabía que Astigueta "...ha encontrado resistencias tan vulgares y pueriles como egoístas, inatendibles tratándose de cosas de conveniencia permanente".<sup>6158</sup> Como excusa se argumentaba que "...habría que abandonar los edificios que ya están trabajados en Córdoba...de considerable costo".<sup>6159</sup> Pero ese argumento no era para Muñecas digno de tomarse en cuenta, pues "...es necesario que se sepa que esos edificios no valen lo que se dice, ni están trabajados de una manera sólida".<sup>6160</sup> Por otro lado, esos edificios podían, a juicio de Muñecas "...venderse a particulares y aún a la Municipalidad de Córdoba que podría tomarlos para Hospitales, que no tiene".<sup>6161</sup> Más aún, esos edificios

"...podrían regalarse a esa provincia para fines de utilidad pública con tal de que el hecho vulgar de esos edificios mal contruidos y erradamente trabajados donde están no fuera obstáculo para levantarlos de nuevo donde permanentemente conviene que estén, que es la estación de Tucumán".<sup>6162</sup>

Era en Tucumán donde

"...se hace la provisión de madera que se llevan a Córdoba para el servicio de la línea, de suerte que teniendo los talleres donde están las maderas se ahorran aquellos costos de conducción, con las ventajas de elegirlos de mejor clase y oportunamente en el lugar que se producen".<sup>6163</sup>

Debiendo prolongarse tarde o temprano el ferrocarril a Jujuy, Muñecas agregaba que era en Tucumán donde

"...están mejor los talleres y administración de la Estación para proveer las necesidades de las dos vías por ser la más central, y por la facilidad de tener a la mano las maderas y el primero de los elementos para construir y reparar vagones y otros objetos correspondientes a los trenes".<sup>6164</sup>

Muñecas hacía notar también que Tucumán "...es el centro de todo el movimiento comercial no solo de la provincia sino del Norte".<sup>6165</sup> Era también

"...el punto más próximo a las estaciones de mayor importancia de la vía, no quedando ya Córdoba, por su localidad y por el empalme de los dos ferrocarriles, sino como un lugar de tránsito para pasajeros y mercaderías".<sup>6166</sup>

Según Muñecas, la localización que él proponía de los talleres y la administración era de interés nacional y no meramente provincial. En esto, Muñecas alegaba que él no procedía como los Mendocinos y Sanjuaninos

"...que procuran hacer del ferrocarril andino una cosa muy casera, muy provinciana a costa de intereses más grandes por ser más nacionales: quieren hasta servirse de los productos del ferrocarril del Norte para sus propósitos egoístas y en ello mezclan intrigas indignas hasta rebajar la circunspección de la oficina de ingenieros".<sup>6167</sup>

Pero si bien en un principio, las elites se polarizaban en términos geográficos o territoriales más que demográficos; con el tiempo comenzaron a polarizarse en términos poblacionales más que territoriales. En este contexto teórico se inscribieron las disputas entre el centro Porteño y la periferia de las provincias interiores así como los procesos de

localización y relocalización de las capitales provinciales.<sup>6168</sup> La localización más discutida fue por cierto la de la Capital Federal, pues antes de ser elegida Buenos Aires, fueron propuestas Rosario, por su localización fluvial, y Río Cuarto, por su centralidad geográfica. Mignanego (1938) nos relata que para la localización de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires (La Plata), fueron estudiadas tres hipótesis alternativas: 1} la de ciudad mediterránea, 2} la de colindante a Buenos Aires, y 3) la de fluvial o marítima, venciendo la segunda, por la importancia concedida a su proximidad con Buenos Aires.<sup>6169</sup>

La re-localización que más trascendencia tuvo en los anales del regionalismo argentino fue el caso de la capital de Entre Ríos, entre aquellos que defendían la antigua capital en Concepción del Uruguay, impuesta por los sucesivos gobiernos provinciales de Justo José de Urquiza; aquellos que buscaban una transacción emplazando la capital en su centro geográfico, Nogoyá; y aquellos otros más modernos que pujaban por la reforma constitucional con la capital en la Costa del Paraná.<sup>6170</sup> En Entre Ríos, esta necesidad de cambio geográfico obedecía a que, a juicio del Diputado Rufino de Elizalde, "...cada uno de los Diputados vive en su Departamento, y no como en otras provincias de la República, en donde todos los días, casi, están en la Capital".<sup>6171</sup> Para el Gobernador Eduardo Racedo, el centro político formado y denominado Costa del Uruguay "...no tiene importancia intrínseca en este Departamento, pero ni fuera de él".<sup>6172</sup> De haber conseguido la oposición que no se tratara la modificación de la capital, Racedo le confesaba a Roca que "...se me hubiera hechado encima la otra costa [del Paraná] que tiene más importancia por su riqueza y numerosa población".<sup>6173</sup> Según Racedo, Enrique Berduc, los Diputados Núñez y Luis Leguizamón "...y los pocos que le quedan a [Ramón] Febre y [Dardo] Rocha...son de su partido para resolver la cuestión por el Paraná".<sup>6174</sup> Mientras que para el Ministro Entrerriano Juan Antonio Mantero, los Dres. Honorio Leguizamón, Benito Cook, Carlos Ugarteche, Alfredo Parodié Mantero, Francisco Quesada, Cigorraga y "...muchos otros jóvenes inteligentes no caben dentro de su partido, porque combaten la traslación de la capital como perjudicial en todos sentidos a la Provincia".<sup>6175</sup> Mantero no se explicaba el propósito deliberado de llevar la capital al Paraná, pues habiendo examinado la cuestión

"...bajo su faz política, bajo su faz económica y bajo la faz de las conveniencias personales y en ninguna de ellas encuentro justificado el paso".<sup>6176</sup>

Pobre Entre Ríos, exclamaba Mantero,

"...si se establecen en el Paraná, con el círculo que actualmente lo rodea. Pobre sobre todo, los que no se hayan mostrado afectos a su política completamente personal. De esos va a ver el reino de los cielos, porque van a sufrir hambre y sed, y las persecuciones de la justicia".<sup>6177</sup>

Y para Anastasio Cardassy, fuere o no justa la traslación de la capital, era "...a todas luces inconveniente".<sup>6178</sup> De resultas de esta pugna geográfica, hasta el día de hoy se respeta el principio de la alternancia --para el encabezamiento de las listas de candidatos electivos de la Unión Cívica Radical-- entre las costas del Paraná y el Uruguay.<sup>6179</sup>

Y también en Santa Fé regía la predominante incidencia de la fractura territorial o geográfica.<sup>6180</sup> Esta fractura se manifestaba entre las localidades geográficas norteñas sufragáneas a la ciudad de Santa Fé, donde existía un fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras localidades sureñas identificadas con la ciudad de Rosario, donde se daba una sólida presencia Radical. Por ello, una de las cosas que abortaba las candidaturas era la filiación geográfica de los candidatos, según que fueran originarios del Rosario o de Santa

Fé. En la década del 80, la coalición integrada en el Club del Pueblo había sufrido una división profunda. En el Rosario, la facción hegemónica pertenecía al Dr. Gerónimo Cello, y en Santa Fé al Dr. José Gálvez. Mientras a Gálvez lo apoyaba la familia de Iturraspe, a Cello lo apoyaba la familia de Paredes, "...que son largas ambas y hace tiempo trabajan por el imperio".<sup>6181</sup> Asimismo, a juzgar por la información que el Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López le remite a Juárez Celman, entre las familias Gálvez e Iriondo "...se ha producido una escisión que convenía alentar, dando esperanzas a los Iriondos".<sup>6182</sup> Y en 1897 como la candidatura de José Bernardo Iturraspe,<sup>6183</sup> estaba puesta en tela de juicio por Galvistas y Leivistas, surgieron como alternativas la del Dr. Luis A. Vila, prohijado por su primo Juan Terrosa, y ayudado por el Gobernador de Entre Ríos Sabá Z. Hernández; la de Juan Terrosa acompañado por "...los mismos elementos de familia que a Vila,...[ambos con] anteriores afinidades con Marcos Juárez y más tarde con el modernismo";<sup>6184</sup> y la del Dr. José García González, prohijado por el ex-Gobernador Juan Manuel Cafferata.<sup>6185</sup> Pero al referirse a estos candidatos a Gobernador, Desiderio Rosas le manifestaba a Roca, "...que todos aquellos individuos son hombres del Rosario y tu sabes toda la repulsión y los temores que les suspiramos a los hombres de Santa Fé, ante el peligro para estos, de perder la Capital de la Provincia".<sup>6186</sup> Finalmente, con motivo del asesinato del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli, la candidatura de Iturraspe fue confirmada, nombrándose en lugar de Grandoli a su hermano Octavio "...hermano del finado y pariente mío por ser casado con una hija del Dr. Freyre".<sup>6187</sup> A último momento, el Diputado Lorenzo Anadón intentó persuadir al Gobernador Luciano Leiva que eliminara la candidatura Iturraspe proponiendo la de Tiburcio Benegas, pero fracasó en el intento.<sup>6188</sup>

Dentro de la etapa de la Organización Nacional (1852-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de conciliación, como en los casos de Jujuy y Corrientes, finalmente prevalecieron en la sustentación de las facciones políticas en pugna la fuerza gestatoria y gravitatoria de ciertas fracturas genéticas o pre-modernas. El estudio comparado nos revela como la línea de ruptura etno-lingüística estuvo politizada en Corrientes y Jujuy con más fuerza que en Córdoba y Catamarca; y que la línea de ruptura religiosa estuvo politizada en Córdoba y Catamarca con más fuerza que en Corrientes y Jujuy. También es interesante destacar, en el caso de Jujuy, como la facción Barcenista, que había tomado posiciones francamente anti-indígenas, fundaba su base social en corporaciones urbanas artesanales. Y en el caso de Catamarca, como la facción Figueroísta, apoyada por las corporaciones artesanales, se enfrentaba a los Castristas, de fuerte base ideológica Católica.

### Capítulo III-B-5.

#### **Expansión agropecuaria y latifundio en la provincia de Buenos Aires (1820-1852).**

#### Índice

- E-I Resultados del régimen de enfiteusis.
- E-II Migración interna.
- E-III Subdesarrollo de la agricultura.
- E-IV Política de reforma rural.
- E-V Oferta de nuevas tierras.
- E-VI Tamaño de los bienes raíces rurales.
- E-VII Impacto de las guerras y los bloqueos militares.

- E-VIII Crisis económica de la década de 1830.
- E-IX Economías comerciales de escala.
- E-X Ventas de Rosas.
- E-XI Donación de tierras.
- E-XII División de la clase dominante rural.
- E-XIII Política de confiscación de tierras.
- E-XIV Historia dominial de predios rurales.

### **Introducción del capítulo III-B-5.**

La distribución de tierras en las regiones fronterizas de las pampas Bonaerenses dio origen a un debate de opuestas perspectivas que aún prevalece hoy día. Una primera perspectiva (Coni, 1920, 1927), puso énfasis en la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, pudieron haber tenido en la definición del patrón de tenencia de la tierra agrícola, y no de la tierra ganadera. Desde una perspectiva opuesta, una aproximación crítica (Oddone, 1930; y Sabato, 1989) puso énfasis en el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la distribución inicial de tierra pública, que con el correr del siglo vino a consolidar la formación de una economía rentista o lo que se dio en denominar la oligarquía Argentina.<sup>6189</sup>

En esta sección, trato de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en la provincia de Buenos Aires desde ambas perspectivas. Desde los comienzos, la distribución de tierras en las regiones de frontera de las pampas argentinas dio origen a un debate que aún subsiste hoy día. La primera mirada (Coni, 1920, 1927), enfatiza la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, podrían haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.<sup>6190</sup> La otra postura (Oddone, 1930), enfatiza el rol que los factores políticos e institucionales podrían haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, que consolidó la formación de la llamada oligarquía argentina.<sup>6191</sup> En este capítulo, parto de ambas perspectivas, con el fin de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en las pampas argentinas.

El principal objetivo de este capítulo es estudiar un proyecto de reforma de tierras y una posterior contrarreforma durante la primera mitad del siglo diecinueve. Este proceso ocurrió a causa de la especulación y la acumulación de tierras públicas en manos privadas en Buenos Aires. Los efectos de la estrategia de reforma rural (transición de una vía precapitalista y comercial a una vía campesina de capitalismo rural) intentada por un gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la república argentina: la enfiteusis de Bernardino Rivadavia (1822-39), así como los de una política de contrarreforma (un cambio de una vía campesina a una vía “neo-junker” de capitalismo rural): las ventas de Juan Manuel de Rosas, fueron también significativos.

### **E-I Los resultados del régimen de enfiteusis.**

La contradicción entre los fines agrarios rivadavianos (la agricultura yeoman) y los resultados del régimen de enfiteusis (el incremento del latifundio), han sido tópico de muchos debates historiográficos. Bartolomé Mitre, más tarde presidente del país, adoptó las ideas fisiocráticas de Belgrano. Sostuvo en 1857, que mientras los arrendamientos de tierras públicas, o sistema de arrendamiento, estaban en armonía con la venta gradual de

tierras públicas, el sistema de enfiteusis obraba en contra de la venta de tierras públicas. Deslindando al régimen de enfiteusis, que no permitía ventas de tierras, del sistema de arrendamiento que sí las permitía, Mitre intentó diferenciarse tanto de la política de reforma rural rivadaviana como obtener el apoyo político de la embrionaria clase terrateniente Bonaerense.<sup>6192</sup> Para defender su proyecto, Mitre atribuyó los efectos mono-productivos y de despoblamiento al sistema de enfiteusis. Sostuvo que la enfiteusis incrementaba el número de cabezas de ganado en vez del número de campesinos. Usando este argumento, Mitre asignaba implícitamente al sistema de arrendamiento los efectos de diversificación en la economía rural. En el debate, Carlos Tejedor, gobernador de la provincia Buenos Aires (1876-1880), mantuvo la posición opuesta. Enfatizó la relación jurídica esencial entre la enfiteusis y el sistema de arrendamiento, y señaló la superioridad de la enfiteusis sobre la propiedad privada. Tejedor intentó sin éxito apoyar sus argumentos acusando inoportunamente a Mitre de ser "comunista". Mitre le respondió que precisamente aquellos que apoyaban la enfiteusis eran quienes querían "introducir las ideas **comunistas** en el país".<sup>6193</sup> Mitre finalizó diciendo que era especialmente el sistema de arrendamiento el que permitía a los campesinos establecerse en la tierra haciéndolos propietarios de las tierras. Eso es decir, que con el arrendamiento uno va a la venta y a través de ella a la propiedad privada.<sup>6194</sup> Mitre, acuciado por la amplia repercusión mundial de las revoluciones francesa y alemana de 1848, se anticipó por más de un siglo a la ideología de la Alianza para el Progreso. De acuerdo a esta ideología, la distribución más equitativa de la propiedad privada era la mejor manera de obstruir al comunismo.<sup>6195</sup> Más tarde, los liberales centristas, como Andrés Lamas (1883), intentaron asignar al sistema de enfiteusis una semejanza a la propuesta de impuesto único de Henry George, resucitando en cierta forma las ideas fisiocráticas. Pensaba que Rivadavia buscaba por medio del sistema de enfiteusis impedir que la tierra fuera sujeto de oferta y demanda, y evitar que los terratenientes se aprovecharan de alquilar la tierra. Para casi todos los economistas liberales de la época con quienes Rivadavia estaba familiarizado (Ricardo, Bentham, Destutt de Tracy, Sismonde de Sismondi, Mill, etc.), la renta obtenida del alquiler de la tierra era considerada una explotación indirecta de la clase trabajadora urbana.<sup>6196</sup> De acuerdo a estos economistas liberales, la mejor manera de que los terratenientes se apropiaran de este valor excedente era declarando a la tierra propiedad estatal y permitiendo al estado recoger el alquiler. Esa es la causa por la que, de acuerdo a Lamas, la burguesía liberal liderada por Rivadavia intentaba evitar la propiedad privada de la tierra. Argumentaba que Rivadavia deseaba convertir a la tierra pública en propiedad común de la clase burguesa en forma de propiedad estatal.

Asimismo, los liberales de izquierda, como Carlos Antola y Alfredo Palacios, en su deseo de corroer a la oligarquía terrateniente, atribuyeron al sistema Rivadaviano un intencionado salto de una vía feudal a una vía socialista de desarrollo rural.<sup>6197</sup> Por otra parte, los liberales de derecha (Lamas, Lobos, Coni, Piccirilli, etc.) intentaron probar que Rivadavia nunca tuvo en mente un cambio radical en la estructura latifundista. Para probar esto, señalan que Rivadavia nunca extendió la enfiteusis a tierras ya dadas en propiedad privada ni declaró a la enfiteusis perpetua. Concluían que para Rivadavia, la enfiteusis era un sistema provisional en la transición de una vía precapitalista a una vía campesina de capitalismo agrario. En cambio, de acuerdo a una más reciente escuela revisionista de izquierda, la enfiteusis rivadaviana puede ser vista como una vía "neo-junker" hacia el capitalismo agrario. En otras palabras, un sistema de "expropiación legal de la comunidad indígena y del campesinado libre, un sistema dirigido a impedir la compra de tierra por productores directos a fin de beneficiar a los poseedores de tierra ricos que ya eran propietarios".<sup>6198</sup>

Como es bien sabido, las reformas en sí mismas contienen las semillas de la contrarreforma. Sus defectos, guiando a la especulación progresiva y al latifundio, obedecieron no sólo a la forma en que se llevaron a cabo (por ejemplo: enormes tamaños de arrendamientos de tierras, bajos estipendios de tierra, largo plazo de arrendamientos, propietarios ausentistas, etc.), sino también a causa de las presiones internas y externas (por ejemplo: la dependencia del comercio orientado hacia el exterior, las crisis internacionales y domésticas, las deudas externas, etc.). El fracaso de esta reforma abrió la puerta a la política contra-reformista de Rosas.

## **E-II La migración interna.**

Entre las causas que ejercieron presión para reformar el sistema de tenencia de la tierra Bonaerense, debe dársele crédito también a la migración interna. Esta presión vino a ser sentida a comienzos del período colonial. En esa época, aquellos considerados "hacendados" o propietarios de ganado incluían sólo a aquellos propietarios de tierras que poseían como mínimo una suerte de estancia. Esta unidad económica consistía en una propiedad de media legua de frente por una legua y media de fondo, equivalente a tres cuartos de legua cuadrada, o 2.024 hectáreas. Cualquiera que poseyera una extensión menor de tierra no podía ser considerado legalmente como un hacendado y tenía que resignar por ley su interés ganadero, para volverse un labrador o, en otras palabras, para dedicarse a la agricultura.<sup>6199</sup> La escasez y el elevado precio de la mano de obra habían guiado a la clase dominante a apoderarse de grandes lotes de la mayoría de la tierra libre disponible de manera de evitar el minifundio y los salarios elevados.

## **E-III El subdesarrollo de la agricultura.**

Como resultado de esta legislación discriminatoria, las tierras de pastoreo tendían a fortalecerse en detrimento de la agricultura. Esta situación motivó que el gobierno español en América, desde fines del siglo dieciséis, emprendiera duras discusiones sobre las causas fundamentales de la falta de desarrollo agrícola y del latifundio. Finalmente, en 1782 la corona Borbónica reconoció en la Ordenanza de Intendentes que el tipo generalizado de política de tierras era el principal factor responsable de este subdesarrollo. Como una forma de resolver el problema, a los Intendentes Reales les fue concedido la explícita autoridad para distribuir tierra real desocupada.<sup>6200</sup> Los funcionarios ilustrados que poseían posiciones importantes en el gobierno español de la colonia, como Juan José Sagasti, Agustín de la Rosa, Miguel de Lastarria, Félix de Azara y Diego de Alvear, promovieron la distribución de la tierra real desocupada, o aún de dominios privados si sus propietarios eran incapaces o renuentes a cultivarlos.<sup>6201</sup> Siguiendo esta tendencia, Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Buenos Aires a principios del 1800, consideró que el principal obstáculo para el progreso agrícola no yacía ni en las pobres comunicaciones, ni en la discriminación en contra de las exportaciones, ni en la pesada tributación, aunque todo esto existía, sino en el simple hecho que los campesinos de la región carecían de incentivo para producir porque no eran propietarios de la tierra que trabajaban.<sup>6202</sup> Una vez que tuvo lugar la revolución de mayo, un decreto del 4 de septiembre de 1812 emitido por un Triunvirato liderado por el ala radical del partido criollo (J. J. Paso, F. Chiclana y M. Sarratea) intentó distribuir la propiedad de la tierra en forma pareja. Sin embargo, el Triunvirato, el único grupo capaz de darle fuerza a esta reforma, fracasó completamente debido a su casi inmediata caída del poder.<sup>6203</sup>

#### **E-IV Política de reforma rural.**

A mediados de la década de 1820, el mismo grupo, que tenía sus raíces en la burguesía mercantil colonial y en los sectores profesionales e intelectuales, regresó al poder. Una vez en el gobierno, intentaron darle fuerza nuevamente a una política de reforma rural. Esta política buscó crear una clase media de colonos a través de la inmigración extranjera, para confrontar así a los intereses saladeriles y terratenientes.<sup>6204</sup> Las legislaturas provincial y nacional debatieron cuestiones tales como los sistemas de tenencia de la tierra, los estipendios, los límites de extensión máxima y los derechos de transferencia. La nueva legislación abrió nuevas esperanzas para los sin tierra. Pero la opción por los arrendamientos estaba esencialmente dictada por la necesidad de reunir capital extranjero para la construcción de medios de comunicación (un puerto) que, a su vez, facilitarían la exportación de tasajo. Como las tierras públicas estaban inmovilizadas por ley para garantizar los préstamos externos, los intelectuales y los políticos descubrieron que la única manera de re-embolsar este dinero a sus acreedores, sería incorporando el dominio público al mercado mundial a través de los arrendamientos públicos (o enfiteusis). La venta de tierras públicas a propietarios privados fue impedida por decreto en abril de 1822. Esto fue así porque la propiedad privada, debido a sus precios elevados, restringía la incorporación de tierras públicas al mercado mundial y socavaba la posibilidad financiera de adquirir préstamos externos.

La enfiteusis, un sistema de reforma rural, mediante el cual la tierra se distribuía, consistía simplemente en un arrendamiento a largo plazo sin opción de compra. El mecanismo por el cual este sistema fue puesto en práctica seguía diversos pasos. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el propósito oculto de usar la tierra pública para garantizar un futuro préstamo externo, prohibió por decreto del 17 de abril de 1822 la venta de tierra pública. Imponiendo este decreto, prohibieron la extensión de cualquier título de propiedad a los individuos. Porque hubo diferentes interpretaciones del decreto, el ministro Rivadavia se sintió obligado el 15 de octubre de 1822, de hacer claro que el decreto del 17 de abril se aplicaba sólo a la tierra bajo dominio público y no sobre aquella bajo dominio privado.<sup>6205</sup> Inmediatamente después, por decreto del 21 de julio de 1822, el gobierno de Buenos Aires ordenó, hasta que una ley nacional pudiera ser sancionada, la distribución de tierras públicas a través del sistema de enfiteusis, estableciendo un período con un término de 10 años y una tasación de tierras de dos regiones. Las tierras al norte del río Salado fueron tasadas a \$3.000 y \$4.000 pesos plata por legua cuadrada, y las tierras al sur de aquel río a \$2.000 pesos plata por legua cuadrada; la tierra en ambas áreas fue arrendada por el 2 % del valor de tasación.

Aunque la agricultura y la migración extranjera fueron también explícitamente promovidas en el modelo de reforma rural a través de más bajas valuaciones y estipendios, la deseada formación de una clase media de colonos no se produjo. Por una parte, la agricultura no floreció porque las importaciones norteamericanas de harina y las leyes proteccionistas de maíz impuestas por Gran Bretaña en la década de 1820, desalentaron al Río de La Plata para producir grano para la exportación y, en cambio, lo alentaron a concentrarse esencialmente en el tasajo para alimentar las plantaciones esclavistas brasileiras. Una vez que las leyes del maíz británicas fueron revocadas (1849), Inglaterra comenzó a solicitar grano de los Estados Unidos y más luego del área Rioplatense. Por otra parte, la agricultura tampoco floreció en esta época a causa de la oposición de los poseedores de tierras dedicada a la cría de ganado. Con referencia a Canadá, pero aplicable en forma similar a Buenos Aires, Mel Watkins argumentó que cuando el bien primario era

de intensa explotación de tierras, como lo era la carne salada, "...los productores del bien primario encontraban de su interés desalentar la inmigración y la colonización, y los inmigrantes con habilidades apropiadas para el desarrollo de productos de trabajo intensivo no encontraban atractivo en migrar".<sup>6206</sup> Como resultado de todo esto, los colonos extranjeros no deseaban migrar a la provincia de Buenos Aires. Además, la River Plate Agricultural Association en Londres, fracasó en convencer a las autoridades argentinas de entregar la tierra pública en propiedad privada.<sup>6207</sup> La especulación sobre los derechos de la tierra.

La especulación sobre los derechos de la tierra fue otra contradicción entre los objetivos y los resultados de Rivadavia. Cuando las expediciones militares invadieron las regiones en manos de los indios pampas, y una ley nacional fue puesta en efecto (1826), la cantidad de tierra pública distribuida en la década de 1820 se incrementó dramáticamente. La totalidad del territorio ubicado entre la costa marítima y una línea trazada desde Melincué a Federación (Junín), Cruz de Guerra (Veinticinco de Mayo), Bahía Blanca y Patagones (véase Mapa 1), fue sometida a un débil control nacional por el General Martín Rodríguez en 1823. Poco después, esencialmente gracias a la expedición del General Federico Rauch en 1825, los indios fueron eliminados de la provincia. Hacia 1826, las estancias se extendían sobre un área de aproximadamente 3.200 leguas cuadradas, 2.127 leguas cuadradas al sur del río Salado más 1.054 leguas cuadradas al norte del mismo río, dentro del área cercada por la línea que corría desde Mar del Plata a través de Tandil, Azul, Cruz de Guerra, Bragado, Federación, Rojas, Pergamino y al norte hasta San Nicolás de los Arroyos.<sup>6208</sup> Para determinar la cantidad de tierra distribuida entre los arrendadores a través del sistema de enfiteusis, uno tiene que contar separadamente el número de otorgamientos y rotaciones. Segundo, uno tiene que determinar de los registros de mensuras de tierra archivados en el departamento topográfico fundado por Rivadavia, si cada otorgamiento y rotación estaban originados en un reclamo inicial o en una transferencia. En todo caso, la fecha del acto previo estaba especificada así como los nombres de aquellos que transferían el derecho enfiteutico. De esta información reconstruí para cada uno de los gobiernos de la época, el número exacto de transacciones y leguas cuadradas otorgadas y transferidas entre los arrendadores. Por ejemplo, el Cuadro 1 muestra que entre 1822 y 1825 inclusive, fueron distribuidos 67 otorgamientos que ascendieron a sólo 196 leguas cuadradas.

Una vez que estos cálculos fueron realizados, pude determinar la superficie total de tierra distribuida en enfiteusis. De acuerdo al Cuadro 1, 443 otorgamientos de enfiteusis, totalizando 2660 leguas cuadradas, y 119 rotaciones, totalizando 870 leguas cuadradas, fueron negociados durante el período 1826-1833. En realidad, como muchos otorgamientos de enfiteusis consistían en tierras previamente distribuidas en enfiteusis, el total de tierras públicas otorgadas en enfiteusis como resultado de la expedición del General Rauch debe ser la diferencia entre la superficie total otorgada en enfiteusis (2.660 leguas cuadradas) y la superficie total transferida (768 leguas cuadradas), es decir, 1.892 leguas cuadradas distribuidas entre 279 arrendadores.<sup>6209</sup>

## **E-V La oferta de nuevas tierras.**

La enorme oferta de nuevas tierras, conjuntamente con la creciente falta de capital, disminuyeron el valor de la unidad de tierra. Estos otorgamientos de tierra representaban 2/3 del total de tierra distribuida desde principios del siglo XVII. De este modo, el costo de la producción de ganado se mantuvo bajo.<sup>6210</sup> De acuerdo al Cuadro 2, durante el período

de 1820 a 1828, el precio promedio de tierra en propiedad privada fue de \$3.514 pesos plata por legua cuadrada, durante el período siguiente (1829-1832) disminuyó 17%, a \$2.932 pesos plata por legua cuadrada, y durante el último período enfiteutico (1833-1838), disminuyó 45%, a \$1.928 pesos plata por legua cuadrada. Abasteciendo el mercado de tierras con tal enorme cantidad de tierra pública, el mercado resultó inmediatamente deprimido y los especuladores desalentados.

#### **E-VI El tamaño de los bienes raíces rurales.**

La introducción de un comercio orientado hacia la exportación, preparado en torno a la explotación del tasajo en la década de 1820, fomentó el incremento del tamaño de los bienes raíces rurales. Cuando Julián Segundo de Agüero, ministro de Rivadavia y el más grande promotor de la ley de enfiteusis, fue cuestionado sobre la falta de un límite máximo en la extensión de las parcelas arrendadas, replicó diciendo que el sólo mecanismo del estipendio enfiteutico impediría la acumulación latifundista de la tierra pública, porque nadie arrendaría más de lo que financieramente fuera capaz de poner en producción. Pero la historia enseñó que las rentas bajas cargadas por un estado oligárquico corrían en favor del latifundio.<sup>6211</sup> El Cuadro 2 muestra que la superficie promedio se incrementó en la década de 1820 casi 5 veces, desde una legua cuadrada en la región distribuida en propiedad privada en la década de 1810, a 5,9 leguas cuadradas en la sección enfiteutica distribuida en el período 1820-1828. A principios de la década de 1830 la unidad promedio en la sección enfiteutica ascendió un 14%, desde 5,9 leguas cuadradas durante los años 1820-1828 a 6,7 leguas cuadradas durante el crítico período de 1829-1832. Durante fines de la década de 1830, la unidad promedio en la misma sección enfiteutica ascendió un 24%, desde 6,7 leguas cuadradas a 8,3 leguas cuadradas durante el período 1833-1838. Estos cálculos confirman la creciente naturaleza monopolística del sistema de enfiteusis.

#### **E-VII Impacto de las guerras y los bloqueos militares.**

Las guerras y los bloqueos militares, reduciendo drásticamente la demanda externa en bienes primarios, fueron un fuerte factor que contribuyó al fracaso de las políticas de reforma rural. La guerra cisplatina con Brasil, que hizo erupción en 1825 en medio de una crisis económica de amplitud mundial, comenzó rodeada de un extremo apoyo popular en Buenos Aires. Sin embargo, al prolongarse interminablemente se volvía cada día más impopular. La provincia de Buenos Aires, en medio de su expansión ganadera, fue seriamente afectada por las consecuencias del conflicto. Como resultado de la elevada inflación y de un bloqueo marítimo por la armada brasilera, el conflicto golpeó severamente a Buenos Aires. Mientras los grandes propietarios de tierras podían acumular capital a pesar del bloqueo, a través de la multiplicación natural del ganado y la expansión de la nueva frontera sureña, los pequeños propietarios de tierras enfrentaron la bancarrota debido a la falta de crédito. Los trabajadores rurales sufrieron también los efectos de una elevada tasa de desempleo compensada sólo por el reclutamiento militar.<sup>6212</sup> El único beneficiario del bloqueo brasilero de Buenos Aires fue Montevideo y el campo de la costa oriental del Río de la Plata (el mismo fenómeno ocurrió con el bloqueo francés de 1838-1840 y el bloqueo anglo-francés de 1845-1846).<sup>6213</sup>

#### **E-VIII La crisis económica de la década de 1830.**

La crisis económica de la década de 1830 señaló también el fracaso del proyecto de reforma rural rivadaviano y sirvió para incrementar el proceso de concentración de tierras

que comenzó en tiempos coloniales. Aparte de la guerra con Brasil (1825-1828) y de la revolución de diciembre de 1828 que derrocó al gobierno de Dorrego, los desastres naturales también contribuyeron a la crisis de 1830. A fines de 1829 y durando hasta principios de 1832, una intensa sequía azotó el campo de Buenos Aires, seguida por ataques indígenas. Alrededor de 1.500.000 de cabezas de ganado perecieron. Además, los mojones delimitadores de cada propiedad desaparecieron bajo el peso del polvo y el gobierno tuvo que enviar una comisión para evitar disputas entre los propietarios de tierra.<sup>6214</sup> Como resultado de tales sequías, aunque los arrendamientos públicos se incrementaron casi 2 1/2 veces en la cantidad de leguas cuadradas, el mercado privado de tierras rurales experimentó, de acuerdo al Cuadro 3, una fuerte caída de alrededor del 14%. En efecto, el mercado de tierras cayó de \$301.635 pesos plata en 1830 a \$129.031 pesos plata en 1831, y alrededor de \$80.000 pesos plata en 1832 y 1833. El precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, de \$2.805 pesos plata en 1831 a \$1.482 pesos plata en 1833.

### **E-IX Las economías comerciales de escala.**

Las economías comerciales de escala también estuvieron presentes en los casos de desastres naturales. Mientras los grandes propietarios de tierra, como los Anchorena, a causa del tamaño y la diversidad de sus pastos para ganado, pudieron sobrevivir a la sequía y a cualquier fluctuación estacional del clima, los más pequeños poseedores de tierra no pudieron y fueron arrancados del negocio por la fuerza.<sup>6215</sup> El gran número de fincas vendidas a causa de estar profundamente endeudadas con los mercaderes externos, refleja la seria crisis causada por los desastres naturales (véase Cuadro 4). En forma similar, el proceso de concentración de tierras experimentado por prósperos poseedores de tierra, mostrado en los Cuadros 5 y 6, ilustra los resultados económicos de la crisis.

El gobernador Juan Manuel de Rosas, él mismo un gran propietario de tierras y el jefe del partido Federal, también distribuyó tierra en enfiteusis. Las políticas de tenencia de tierra rosistas estaban condicionadas por la competencia por la provisión de las plantaciones esclavistas brasileñas. Como resultado de esta lucha entre Uruguay y Buenos Aires por ir al encuentro de la demanda brasileña de tasajo, tanto Rosas como Fructuoso Rivera, el líder de la facción colorada uruguaya, fortalecieron su base política distribuyendo tierra en enfiteusis. Usando los ataques indios en el sur de Buenos Aires como pretexto, Rosas organizó una famosa expedición en 1833. Una vez que el control sobre el territorio indígena estuvo asegurado, el gobierno de Rosas procedió a distribuir en enfiteusis las nuevas tierras de las regiones de Volcán, Tapalquén, Chapaleofú, Huesos, Quequén, Tandil, Napaleofú, Arroyo Cristiano Muerto y Arroyo Pescado Castigado. Entre 1833 y 1838, de acuerdo al Cuadro 2, Rosas distribuyó 112 otorgamientos de tierra totalizando 933 leguas cuadradas o el 43% de todas las tierras dadas en enfiteusis después de 1822. Esta distribución fue hecha a un tamaño promedio de 8,3 leguas cuadradas, dos leguas cuadradas más grandes que las prevalecientes durante el gobierno de Rivadavia.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el período 1833-1838 muchos de estos otorgamientos de tierra fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras que habían sido previamente distribuidas en enfiteusis, como transferidas a nuevos arrendatarios cuyos contratos estaban cancelados, el número de poseedores de enfiteusis y el área territorial de la que el estado provincial disponía eran mucho menos que las 933 leguas cuadradas mencionadas más arriba. La cantidad anual acumulada de enfiteusis sobre nuevas tierras puede ser determinada restando la cantidad total de arrendamientos procedentes de enfiteusis (columna 2 del Cuadro 7) de la cantidad total de otorgamientos de enfiteusis

(columna 1 del Cuadro 7), o restando el monto total de transferencias procedentes de los otorgamientos de enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) de la cantidad total de enfiteusis (columna 1 del Cuadro 8). A su turno, la cantidad total de transferencias procedentes de la enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) es el resultado de restar la cantidad total de transferencias procedentes de las transferencias (columna 4 del Cuadro 8) de la cantidad total de transferencias (columna 3 del Cuadro 8). El resultado final de ambos cálculos difiere ligeramente y, en ambos casos, las cifras a las que se llega son mucho menores que la cantidad de otorgamientos de enfiteusis acumulada (columna 2 del Cuadro 8). En 1833, por primera vez, el número de rotaciones de otorgamientos de enfiteusis excedió al número de otorgamientos o de concesiones. El Cuadro 8 muestra cómo, cuando la cantidad de tierra dada en enfiteusis se incrementaba (columna 1 del Cuadro 8), la cantidad de tierra transferida en enfiteusis disminuía (columna 3 del Cuadro 8), y viceversa. Por ejemplo, mientras en 1835 la cantidad de tierra dada en enfiteusis creció hasta las 483 leguas cuadradas, triplicando las cifras de 1834, la cantidad de tierra transferida en enfiteusis disminuyó de 260 leguas cuadradas, en 1834, a 108 leguas cuadradas en 1835.

Como resultado de los gastos extraordinarios incurridos en la expedición contra los indios en 1833, Rosas se encontró a sí mismo obligado a cubrir su deuda por medio de la venta de tierras. Este proceso de venta de tierras implicaba, con respecto al proceso previo de enfiteusis, un paso hacia atrás o una política de contrarreforma, porque fortaleció y consolidó la estructura latifundista ya existente. Además, Rosas usó la política de venta de tierras para robustecer aún más su base política. El proyecto de venta de tierras del 28 de febrero de 1834, fue sancionado por la legislatura en 1836.<sup>6216</sup> Por este acto, el gobierno fue autorizado a disponer de 1.500 leguas cuadradas en la provincia de Buenos Aires, parte de las cuales fueron mantenidas en enfiteusis.<sup>6217</sup>

## **E-X Las ventas de Rosas.**

Doblando las rentas a la expiración del período de enfiteusis en enero de 1838, y reduciendo los precios de venta de tierras públicas, la legislación de Rosas --que no canceló los contratos de enfiteusis existentes-- forzó a los arrendadores a comprar la tierra que tenían en enfiteusis. Cuanto más alta era la proporción de renta de la tierra sobre el precio de la tierra, más provechoso era comprar que arrendar. Además, el hecho que la tierra mantenida en enfiteusis no podía ser vendida a los no poseedores, alentó a los capitalistas a comprar los derechos de enfiteusis de los poseedores financieramente incapaces de comprar la tierra. El Cuadro 1 muestra que en 1837, un año después que la ley de venta de tierras fuera promulgada, hubo 35 compradores de derechos de enfiteusis por 302 leguas cuadradas. Pero a pesar de dar a los poseedores la prioridad para comprar en forma completa la tierra que tenían en enfiteusis, la escasez de capital y las altas tasas de interés les hicieron muy dificultosa la compra de tierra.<sup>6218</sup>

Asimismo, a causa de la falta de capital y la oferta excesiva de tierras públicas, el precio de la tierra en el mercado cayó dramáticamente. Las deprimidas estimaciones de la tierra en la década de 1830, no sólo se dieron en las ventas de tierras públicas sino también en el mercado de tierra privado. Aunque la expansión del área de 1825-1828 fue asimilada por el incremento en la demanda de tasajo, la expansión del área de la década de 1830 no fue asimilada tan rápido como en la década de 1820. De acuerdo a Broide (1951), el precio del tasajo subió un 34% en 1836 por encima del precio de 1833.<sup>6219</sup> Un incremento en la demanda de tasajo, aunque implicaba la accesibilidad de un área nueva y un flujo de capital y trabajo en estas tierras, a causa de la oferta excesiva de tierras, en vez de

incrementar el precio de la legua cuadrada lo disminuyó. Cuanto más al sur, más duramente caía el precio. Esto ocurría porque las incumplidas expectativas especulativas de los aumentos del precio de la tierra sucedieron esencialmente en tierras nuevas. Mientras los valores de tierra en Magdalena disminuyeron 33%, en Cañuelas declinaron 50%, en Tuyú 73% y en Mar Chiquita, 85%.<sup>6220</sup> En la región central, los partidos como Escobar experimentaron una disminución del 75%.<sup>6221</sup> Finalmente, en la región nortea, mientras los valores del pago de Pergamino disminuyeron 17%, en Arrecifes descendieron 65%.<sup>6222</sup> Sólo durante la campaña militar de Roca en 1880 fue vendida la tierra pública a tan bajos precios. Durante los siete meses siguientes a la promulgación de la ley de 1836, 128 leguas cuadradas fueron vendidas a 34 compradores a un tamaño promedio de 3,7 leguas cuadradas y a un precio promedio de \$457 pesos plata por legua cuadrada. Este precio era 77% menor que la valuación oficial de la tierra pública (véase Cuadro 9). Luego de esta primera pequeña embestida la demanda de tierra disminuyó y el gobierno buscó estimular las ventas de tierra a través del mejoramiento de las condiciones de pago.<sup>6223</sup> A pesar de estas ventajas, la demanda por tierras no excedió a la oferta, y en 1837, disminuyeron los precios promedio de Buenos Aires por legua cuadrada en los mercados privado y público. En ese año, el precio promedio cayó a \$1.142 pesos plata por legua cuadrada, un descenso del 33% con respecto al año anterior (Véase Cuadro 10). En 1837, como muestra el Cuadro 8, sólo 178 leguas cuadradas distribuidas entre 34 compradores a un tamaño promedio de 5,2 leguas cuadradas fueron vendidas por una cantidad total de \$98.882 pesos plata a un precio promedio de \$555 por legua cuadrada. El gobierno se encontró entonces obligado a emitir \$4.200.000 en billetes de la Casa de la Moneda para completar parte del déficit en el presupuesto de 1837, financiado por siete millones de pesos de bonos de una emisión de 17 millones de pesos de bonos.<sup>6224</sup>

La repentina caída de los ingresos aduaneros causada por el bloqueo francés de Buenos Aires en 1838, indujo a Rosas a ir en busca de recursos financieros por medio de la venta de tierras públicas y la inflación monetaria. En diciembre de 1838, fueron emitidos \$16.575.000 pesos en papel moneda, aumentando la cantidad de circulante en un 80%. Las rentas de enfiteusis aumentaron de \$60 pesos plata a \$120 en tierras de cultivo, y de \$40 a \$80 pesos plata por legua cuadrada en tierras de pastoreo y, como resultado, los capitalistas privados prefirieron comprar tierra del gobierno a continuar arrendando. En efecto, en 1838, como muestra el Cuadro 9, alrededor de 600 leguas cuadradas de las 1.500 leguas cuadradas fueron vendidas a 140 compradores a un tamaño promedio de 4,2 leguas cuadradas por una cantidad total de \$240.511 pesos plata, a un precio promedio de \$408 pesos plata por legua cuadrada. Esto fue así porque la renta de mercado capitalizada, incluyendo los esperados cambios en estas rentas, era más elevada que el precio de venta de la tierra, haciendo a los poseedores preferir volverse propietarios que continuar arrendando. Como esta ley no requería ser propietarios de tierras para establecerse en la tierra antes de estar habilitados para comprarla, los propietarios de tierra ausentistas y los especuladores también le sacaron provecho.

Siguiendo este flujo de creciente disponibilidad de tierras, el precio promedio por legua cuadrada disminuyó aún más. En efecto, en 1838 en los mercados público y privado, de acuerdo al Cuadro 10, el precio promedio por legua cuadrada alcanzó \$616 pesos plata, 46% menos que en 1837. A fines de 1838, Rosas admitió que una gran porción de las 1.500 leguas cuadradas seguían manteniéndose sin vender. Esperaba, sin embargo, obtener un millón de pesos papel por este medio en 1839.<sup>6225</sup> En realidad, su venta redujo, de acuerdo al Cuadro 9, \$99.222 pesos plata, o casi 1 1/2 millones de pesos papel por 365 leguas cuadradas vendidas en 1839 entre 87 compradores a un tamaño promedio de 4,2

leguas cuadradas y a un precio promedio de \$272 pesos plata por legua cuadrada. Esta última venta derribó el precio promedio por legua cuadrada en los mercados público y privado, de acuerdo al Cuadro 10, a \$451 pesos plata por legua cuadrada. Esto significó una disminución del 27% con respecto a 1838 y un 74% con respecto a 1836. Finalmente, el área total incorporada al mercado privado de tierras rurales durante el período 1836-1839, de acuerdo al Cuadro 2, alcanzó a 1.315 leguas cuadradas. Esta área estaba distribuida entre 298 propietarios nuevos a un tamaño promedio de 4,4 leguas cuadradas cada uno, o 73% del área total hasta allí distribuida en propiedad privada y, de acuerdo a las cifras del censo de 1836, casi un propietario de tierras cada cien habitantes. Además, casi todos aquellos que más tarde lucharon contra Rosas en la revolución del Sur de 1836, no fueron favorecidos por la enorme venta de tierras que comenzó en 1836. Aquellas pocas excepciones fueron los casos de Ambrosio Cramer, Ambrosio Sáenz Valiente y los hermanos Fernández de Agüero.

### **E-XI Donación de tierras.**

Además de las ventas de tierras, el gobierno de Rosas donó casi 800 leguas cuadradas a los oficiales del ejército en 1839, a través de los vales de tierra, conocidos como "boletos de sangre". Este último apodo fue dado porque fueron expedidos en retribución por la represión de la Revolución de 1839. Los vales de tierra le asignaban a su poseedor parcelas de tierra pública donde quiera que existieran siempre y cuando estuvieran libres de reclamos preexistentes. Si los poseedores ya tenían la tierra en enfiteusis, el vale convertía el área específica de la posesión en propiedad privada; si los poseedores no poseían la tierra, el vale los acreditaba para hacerlo.<sup>6226</sup> El vale fue emitido a los soldados, a los empleados públicos y a otros en retribución por sus servicios públicos. Muchos de los beneficiarios no deseaban ser colonos y necesitaban efectivo con urgencia, y desde que el valor fue negociable pasó rápidamente a las manos de los especuladores en una fracción menor de su valor nominal.<sup>6227</sup>

### **E-XII La división de la clase dominante rural.**

Como resultado de la forma políticamente discriminatoria en que la tierra pública fue asignada a fines de la década de 1830, la clase dominante rural estuvo dividida en dos facciones: aquellos que estaban previamente establecidos en la región sureña y que estaban más orientados hacia la cría de ovejas, se enrolaban en el partido unitario,<sup>6228</sup> y aquellos que estaban más orientados hacia el vacuno y llegaban a la región sur, se enrolaban en el partido federal.<sup>6229</sup> Aquellos vinculados con los intereses basados en las exportaciones de carne salada, fundamentalmente federales, temían que los ovejeros, fundamentalmente unitarios, pudieran desafiar su casi absoluta hegemonía. La cría de ovejas en la región del Río de la Plata fue una actividad de exportación, intensiva en mano de obra. Incluía inmigración extranjera, alambrado y una elevada tasa de densidad de población, todo lo que podría haber dado nacimiento a una nueva clase media.<sup>6230</sup> Sacando provecho de los sentimientos chauvinistas que los bloqueos franceses generaban, cuando la Revolución del Sur de Dolores estalló en 1839 y la guerra civil hizo erupción,<sup>6231</sup> los propietarios de tierra estrechamente vinculados a la industria de la carne salada destruyeron una gran parte de aquellos establecimientos donde las innovaciones ovejeras habían sido hechas.<sup>6232</sup> Para frenar la influencia creciente de los propietarios de orientación ovejera, los intereses del tasajo recurrieron primero a las ventas de tierra a muy bajos precios y luego a las confiscaciones políticas.

Durante el bloqueo, los grandes propietarios de tierras incrementaron su acumulación de capital. Acumulaban sus productos en sus propias fincas, evitando de este modo los costos de transporte y almacenamiento en la ciudad de Buenos Aires.<sup>6233</sup> Hacia septiembre de 1840, enormes cantidades de cuero, lana y cerda, fueron almacenadas en el campo. Estos fueron los resultados de dos años y medio de acumulación.<sup>6234</sup> Por otra parte, los pulperos estaban forzados a cerrar o reducir severamente sus operaciones por estar privados de los medios de crédito externos. Los suministros fueron también dejados sin un mercado para productos agrícolas. Una vez finalizado el bloqueo, el comercio externo comenzó a compensar las pérdidas de treinta meses de interrupción, reparando las enormes pérdidas causadas por la guerra. Pero este fue también precisamente el momento elegido por Rosas para tomar posesión de las propiedades unitarias.<sup>6235</sup> Un mes después del día de la confiscación de las propiedades unitarias, fue firmado un tratado con Francia y el bloqueo fue levantado.

### **E-XIII La política de confiscación de tierras.**

La política de confiscación de tierras evitó la posibilidad que los enemigos políticos pudieran reconstruir su fortaleza económica. Pero no todos los enemigos políticos perdieron sus propiedades. Una gran parte de aquellos que se opusieron a Rosas, frecuentemente llamados "salvajes unitarios", se las ingeniaron para vender sus propiedades a los extranjeros. Amenazados con tener sus propiedades embargadas por Rosas, aquellos propietarios de tierras las vendieron por debajo del precio a fin de obtener algunos recursos financieros con que sobrevivir en el exilio.<sup>6236</sup> Sin embargo, mientras duró la crisis de hegemonía de la década de 1820, la nueva crisis política de 1840 generó una profunda caída en los índices de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 3 muestra que el número de transacciones cayó 50%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó 60%, y el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras rurales disminuyó 43%. Además, los Cuadros 11 y 12 muestran los nombres de los capitalistas que sacaron provecho de esta crisis comprando por debajo del precio las propiedades rurales de los propietarios en bancarrota.

La cantidad de tierra comercialmente congelada como resultado de las confiscaciones políticas de tierras privadas, puede ser estimada a través de diferentes procedimientos. De acuerdo al indicador dado por la cantidad de vacunos, ovejas y caballos confiscados en 1840, 562 leguas cuadradas, o el 18% del total de tierras hasta ese momento distribuidas en propiedad privada, fueron embargadas por razones políticas.<sup>6237</sup> Pero las confiscaciones de tierra sin redistribución ayudaron a congelar el mercado de tierras. La cantidad total de tierra susceptible de ser comercializada disminuyó casi 18%, desde 3.321 leguas cuadradas antes de la confiscación, a 2.713 leguas cuadradas después de ella. La mayor parte de los embargos ocurrió en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, donde la revuelta de Dolores tuvo lugar. Allí, la tierra embargada por la dictadura alcanzó 469 leguas cuadradas, o el 77% del total de tierra confiscada, por un valor de \$11.407.000 pesos plata. El norte de la provincia en cambio, sufrió un impacto menor. El total de tierra confiscada alcanzó sólo 141 leguas cuadradas, o 23%, a un valor de más de \$700.000 pesos plata. A pesar del hecho que, de acuerdo al Cuadro 13, la proporción promedio de ovejas sobre vacas era menor en los pagos sureños, 32%, que en los pagos norteños, 39%, los propietarios de ovejas fueron mucho más dañados por las confiscaciones políticas que los ganaderos. La proporción de ovejas confiscadas en los pagos sureños sobre la cantidad total de ovejas existentes en ese momento en la provincia, doblaba la proporción de vacuno confiscado. Contando con las cifras provistas por

Florencio Varela en El Comercio del Plata, está a la vista que, mientras el 10% del vacuno disponible en la provincia estaba secuestrado porque pertenecía a los oponentes de Rosas, alrededor del 20% de las ovejas fue confiscado por la misma razón.

#### **E-XIV La historia dominial de predios rurales.**

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de compraventas, protocolizadas entre 1810 y 1852.<sup>6238</sup> Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de ; en la banda norte de la Matanza a ; en las cabezadas de la Magdalena, a ; en la banda sur del pago de Luján, a ; y en el pago de San Andrés de Giles, a .

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial.

Las confiscaciones de tierra fueron expedidas como vengativas armas políticas más que como políticas de tierra pública. Mientras que las confiscaciones de tierras privadas de Rosas en la década de 1840 no fueron redistribuidas, las confiscaciones de las tierras de Rosas en la década de 1850 en los actuales pagos de General Belgrano y Las Flores, fueron efectivamente distribuidas durante la presidencia de Mitre. Los lotes vendidos no excedían una legua cuadrada, estableciendo un precio mínimo de \$200.000 y \$100.000 pesos papel, pagables a término. Los habitantes presentes disfrutaron de privilegios en la compra.<sup>6239</sup> Además, de acuerdo a la ley del 12 de octubre de 1858, alrededor de 800 leguas cuadradas, donadas entre el 8 de diciembre de 1829 y el 2 de febrero de 1852, fueron invalidadas. Sin embargo, las ulteriores propuestas de reforma rural que pudieron haber privado de sus tierras a las cincuenta familias que fueron el apoyo del terrorismo de estado Rosista y distribuir las entre la gente sin tierras, no fueron seguidas.

#### **Conclusión**

El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica mucho el ascenso en los valores de la tierra y de la especulación en arrendamientos de enfiteusis en la década de 1820. En efecto, la creciente demanda por tasajo explicó el

aumento de los valores de tierra durante el primer período de enfiteusis (1822-1828). Por el contrario, los bloqueos internacionales, las guerras civiles, los ataques indígenas y las sequías, ocurridos en las décadas de 1830 y 1840, pueden ser consideradas como responsables por la caída en los valores de tierra y el fracaso en la sustitución propuesta de las vías pre-capitalistas y "neo-junker" a las vías campesinas del desarrollo rural capitalista implementada en la década de 1820.

Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio exterior de Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, los principales retrasos ocurrieron en 1829-1832, 1838-1840 y 1845-1846. El impacto que los fenómenos bélicos tuvieron en las políticas de reforma puede ser inducido mediante los valores especulativos de tierra. En ese sentido, uno puede distinguir entre bloqueos marítimos causados por conflictos internacionales, como los de 1826-1828, 1838-1840 y 1845-1846 y las revoluciones y las guerras civiles, como las de 1828-1829 y 1839-1840. Los bloqueos marítimos, obstruyendo la comercialización de la producción, tuvieron efectos importantes en los valores especulativos de tierra. La guerra con Brasil (1826-1828) causó una caída del 40% en la cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras. Las consecuencias del bloqueo francés (1838-1840) en el mercado de tierras estuvieron fuertemente mitigados o amortiguados por una oferta extremadamente generosa de tierra pública. El bloqueo anglo-francés de 1845-1846 causó un impacto político mayor que el bloqueo francés de 1838. Sin embargo, la incidencia económica en el mercado de tierras fue ligeramente menor. Alternativamente, las revoluciones y las guerras civiles causaron un daño mayor en la estructura productiva misma que en la comercialización para la producción. Sus efectos fueron a largo plazo y, de esa manera, fueron apenas reflejados en las estadísticas anuales de los valores especulativos de tierra.

Además, las guerras indígenas y los desastres naturales enfatizaron el fracaso de las políticas de reforma rural. Existe una elevada correlación entre los ataques indígenas y las extendidas sequías en los años 1829-1832. La única instancia en que la correlación estadística no se mantuvo fue en 1851, debido a la política pacifista seguida por el gobernador Rosas con las tribus indígenas. En efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a las tribus indígenas eliminaron en ese momento cualquier riesgo de ataque indio. En la primera guerra india, de la década de 1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En el segundo ataque, que ocurrió en 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierra experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó un 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierra cayó 56%.

En suma, el fracaso de la política de reforma rural de Buenos Aires a principios del siglo XIX en tratar de descomponer el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, transformar el desarrollo rural desde una estrategia precapitalista y comercial hacia una estrategia campesina, debe ser atribuida fundamentalmente a los bloqueos internacionales, las guerras civiles y las sequías. Asimismo, las características extensivas de la producción de bienes primarios, más la escasez de capital y trabajo, condujo a los propietarios de vacunos a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado más elevado que los poseedores de ovejas. Con respecto a la cantidad y calidad de los consumos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto era verdad, en parte porque el vacuno era conducido vivo a lo "saladeros" antes de ser sacrificado, mientras que la lana

tenía que ser esquilada primero en el campo y entonces llevada por carro al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades de tierra más baratas y más grandes que las tierras de ovejas. Esta circunstancia explica porque los arrendamientos públicos predominaban en los pagos ganaderos mientras que la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaban el sistema de enfiteusis, los intereses de la lana preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía.

### Capítulo III-B-06

#### **Distribución de la tierra de frontera en la República Oligárquica (1852-1890).\***

#### Índice

- F-I Olas de migración externa e interna.
- F-II Tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública.
- F-III Cantidad de ventas de tierras.
- F-IV Unión de los intereses terratenientes.
- F-V Arrendamiento de tierras públicas.
- F-VI Cantidad de tierra distribuida.
- F-VII Ventas de tierras públicas.
- F-VIII Patrones de inversión individual de tierra.
- F-IX Precios de la tierra en las ventas públicas.
- F-X Período lanero.
- F-XI Impacto de las crisis económicas.
- F-XII Auge ficticio de precios de tierra.
- F-XIII Crisis financiera de 1874.
- F-XIV Ley provincial de 1878 y campaña militar de Alsina.
- F-XV Campaña militar de Roca.
- F-XVI Mercado de tierras rurales.
- F-XVII Especulación y ausentismo.
- F-XVIII Densidad demográfica rural.
- F-XIX Incremento de la inmigración extranjera.

### **Introducción del capítulo III-B-06**

Desde los comienzos, la distribución de tierras en las regiones de frontera de las pampas argentinas dio origen a un debate con perspectivas opuestas que subsiste hoy en día. Una primera perspectiva (Coni, 1920, 1927), pone el énfasis en la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, podría haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.<sup>6240</sup> De la otra parte, una perspectiva crítica (Oddone, 1930; y Sábato, 1989) puso el énfasis en el papel que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, que consolidó la formación de la, llamada por algunos, oligarquía argentina. En este capítulo, parto desde ambas perspectivas, con el fin de

intentar analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierra en las pampas argentinas, luego de la dictadura de Rosas.

Luego de la política rivadaviana de reforma rural, hubo otros proyectos de reforma; aquellos ensayados durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda (1862-1880). Estas reformas diversificaron la producción nacional, promovieron la inmigración extranjera, establecieron un límite en el tamaño de los lotes de tierras para ser enajenados en venta pública y exigieron el poblamiento previo como un requisito para adquirir tierra pública. Durante estos gobiernos se libró una lucha entre tendencias progresistas orientadas hacia el ganado ovino y otras tendencias orientadas hacia los intereses vacunos, logrando la sanción de algunas leyes y decretos que intentaban promover la cría de ovejas y la agricultura.<sup>6241</sup> Los resultados de estas reformas, no obstante, fueron contradictorios. No consiguieron desbaratar el latifundio ni desalentar la especulación. La naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a la producción de materias primas, socavó los honestos fines de aquellas políticas de reforma rural. De este modo, el fracaso de la reforma de Mitre abrió la puerta para la política de contrarreforma de Roca.

#### **F-I Las olas de migración externa e interna.**

En las pampas argentinas, las presiones más intensas por reforma agraria, desde el punto de vista de la población que la apoyaba, provenían principalmente de las olas de migración externa e interna constituidas por especuladores y habitantes. No provenían de una presión que se originaba en el crecimiento demográfico local. En contraste a la reforma agraria convencional de inspiración populista, las reformas agrarias marginales, tal como aquellas practicadas en la pampa argentina durante el siglo XIX, fueron motivadas --de acuerdo con la clasificación de reformas rurales de Antonio García-- para preservar la estructura latifundista. Esto fue hecho por medio de la distribución de tierras nuevas en regiones periféricas y por trabajos de infraestructura física. Estas desviaciones aceleraron una sobrevaluación de tierras y mejoraron los canales de acceso al mercado que fortalecían al latifundio.<sup>6242</sup>

El substrato ideológico de este modelo de reforma agraria, se inserta en la tradición liberal que identifica el progreso económico con la simple modernización de las condiciones de crecimiento agrario, medida en términos de producto per capita. De acuerdo con esta idea, era posible incrementar el producto per capita, a fin de obtener mayor empleo,<sup>6243</sup> una distribución más equitativa del ingreso y una más amplia y más relevante estructura de demanda para el sector manufacturero creciente, incorporando simplemente nuevas tierras por medio de la expansión de la frontera agraria, hacia el sur y el oeste.<sup>6244</sup> Pero la característica institucional más notable de la reforma agraria regional es el hecho que mientras la densidad de población crecía en el campo, disminuyó la proporción de propietarios de tierra sobre el total de la población, sumada a la inmigración neta extranjera e interna.<sup>6245</sup>

#### **F-II La tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública.**

La persistencia de la tendencia acumulativa de tierras públicas en manos monopolísticas, comenzada por los otorgamientos de la enfiteusis rivadaviana en 1823-1826 y las ventas de Rosas en 1836-1839, puede ser verificada analizando la distribución de la propiedad privada rural en la provincia de Buenos Aires treinta años más tarde usando

los datos de la Contribución Directa de 1867. La Contribución Directa consistía en un impuesto directo sobre la propiedad privada de la tierra. Los registros de la Contribución Directa cubren sesenta y nueve pagos de la provincia de Buenos Aires. Los he agrupado en tres diferentes regiones de acuerdo a los criterios geográficos usados en el censo de 1869. Consistían en las regiones norte, central y sur. Cada una de las tres regiones incluían pagos de antigua y reciente colonización. Los últimos son pagos de frontera en vista de que se introducían territorio indígena. Además, en cada una de las tres regiones había tres diferentes tipos de distribución de la tierra: a) donaciones reales asignadas en el siglo XVII; b) ventas reales hechas en "moderada composición" durante el virreinato; c) ventas practicadas durante el Directorio (1816-1819); d) arrendamientos distribuidos en enfiteusis (1822-1838); y e) arrendamientos públicos otorgados entre 1857 y 1875.

Examinando la extensión promedio de las propiedades rurales, es evidente que cuanto más grande era la distancia que las separaba de Buenos Aires, más grande era el tamaño de los predios rurales. Había también una más grande subdivisión de tierra en la región nortea y una menor en la región central y la región sur. El área promedio de un predio en la zona norte era de 1.000 hectáreas. En la zona central, alcanzaba las 1.800 hectáreas. La zona sur alcanzaba las 6.044 hectáreas o 2,24 leguas cuadradas. En la región nortea, debido a la relativamente prematura ocupación, esencialmente en las tierras cercanas a la costa del Paraná y al Río de la Plata, una división extrema de la tierra, obstaculizaba el predominio del latifundio. En esta región prevalecían las propiedades pequeñas y medianas o el minifundio. Este era el caso de Pilar, Capilla del Señor, San Nicolás, Zárate, San Andrés de Giles, Baradero, San Antonio de Areco y San Pedro. De acuerdo al Cuadro 1, en 1867, en la región nortea, 1% del total de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 1.000 hectáreas) controlaban el 20% de la tierra, mientras que el 99% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían menos de 10.000 hectáreas) controlaban el 80% de la tierra. El uno por ciento de los propietarios de tierras que poseían grandes predios de 10.000 hectáreas o más, estaban localizados en los pagos de Rojas, Ramallo, Arrecifes y Pergamino. En la región central, el 2% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 10.000 hectáreas) poseían el 24% de la tierra, mientras que el 98% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían menos de 10.000 hectáreas) controlaban el 76% de la tierra. El 2% de los propietarios de tierra que poseían predios de 10.000 hectáreas o más estaban localizados en pagos de reciente colonización o pagos de frontera como Carmen de Areco, Salto, Chacabuco y Veinticinco de Mayo. En la región sur, en cambio, el 7% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 10.000 hectáreas) controlaban la mitad de la tierra, mientras que el 93% de los pequeños propietarios controlaban la otra mitad. Entre los treinta pagos de la región sur, mientras que cuatro pagos no tenían predios de más de 10.000 hectáreas, había también seis pagos donde no había predios de menos de 1.000 hectáreas. Los pagos con más predios por encima de 10.000 hectáreas eran Tandil y Balcarce con 13 unidades cada uno, seguidos por Pila, Mar Chiquita y Monsalvo con 10 unidades cada uno.

Con el fin de confrontar la distribución de tierras en dos diferentes momentos en el tiempo, he tenido que seleccionar un área geográfica homogénea. Para el propósito de comparar la superficie promedio de las ventas de Rosas con la distribución promedio de la propiedad privada reflejada en la Contribución Directa de 1867, he tenido que calcular sólo aquellos pagos de la región sur que correspondían a la tierra vendida entre 1836 y 1839. En efecto, la superficie promedio de aquellos pagos sureños descendió de 4,4 leguas cuadradas en 1836-1839 a 3,5 leguas cuadradas en 1867, un descenso de sólo el 20%. Fue en la región sureña, donde el avance de la frontera se había incrementado, formando

nuevos pagos al sur del río Salado, donde los predios de grandes extensiones fueron establecidos. Los pagos de no tan reciente colonización pero que estaban localizados al sur del río Salado, como Azul, Tandil y Tapalqué, muestran características de pagos de frontera con grandes predios privados. En los nuevos pagos de frontera se observó el predominio del latifundio en Necochea, donde estancias de menos de 10.000 hectáreas no existían, seguido por Mar Chiquita donde diez estancias, o el 62% de todas las fincas, poseían el 94% de la superficie ocupada por propiedades privadas; luego Pila, donde diez estancias, o el 42%, poseían el 90% de la tierra; Monsalvo (luego Maipú), donde diez estancias, o el 38%, poseían el 86% de la tierra; Tuyú (luego General Lavalle) donde nueve estancias, o el 50%, poseían el 86% de la tierra; y finalmente Balcarce, donde 13 estancias, o el 26%, poseían el 71% de la tierra (Véase Cuadro 1).

### **F-III Cantidad de ventas de tierras.**

Esta leve disminución en la superficie promedio podría deberse no sólo a las alianzas de parentesco a través del matrimonio sino también a pocas subdivisiones comerciales. Las últimas consistieron en ventas privadas practicadas entre 1840 y 1867. De acuerdo a mi banco de datos, la cantidad de ventas de tierras entre 1840 y 1856 alcanzó un total de sólo 589 transacciones en 853 leguas cuadradas, o el 26% de la tierra total hasta ese momento distribuida, y con un valor de \$2.119.433. Estas bajas cifras se debieron esencialmente al hecho que la tierra se encontraba inmovilizada como resultado de los bloqueos marítimos, las sequías y las confiscaciones "políticas" de los productores orientados hacia el ganado ovino. Cuando las potencias europeas bloquearon el puerto de Buenos Aires en 1846, como muestra el Cuadro 2, el número de transacciones cayó el 26% y la cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras descendió también un 35%. La expansión subsecuente del mercado de tierras rurales en 1847 y 1850 se debió a las reanudaciones transitorias del pago de intereses en la deuda externa por el gobierno de Rosas. Se debió también a la creciente emisión de circulante, y, más importante, al incremento de la demanda cubana y brasilera por el tasajo Rioplatense. El miedo a una invasión militar liderada por el general Justo José de Urquiza, el gobernador de la vecina provincia de Entre Ríos, un nuevo líder popular post-Rosas,<sup>6246</sup> con la ayuda del ejército brasilero, más una severa sequía en 1851, también abatieron los precios de la tierra en Buenos Aires. En efecto, de acuerdo al Cuadro 2, en 1851, el número de transacciones descendió un 39%. La cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 62%. La cantidad de dinero invertido en el mercado de tierras cayó un 56%.

### **F-IV La unión de los intereses terratenientes.**

Caseros, la batalla en la que Rosas fue derrotado en febrero de 1852, representó la culminación de un régimen populista autoritario. Sin embargo, no conmovió las raíces económicas de una economía de exportación de bienes primarios, ni significó la disolución del latifundio.<sup>6247</sup> La necesidad de enfrentar a Urquiza, en su ansiedad de tomar posesión de la Aduana de Buenos Aires, unió a la restaurada oligarquía unitaria terrateniente de Buenos Aires con la oligarquía federal terrateniente de Buenos Aires. Esta inestable coalición generó la revolución del 11 de septiembre de 1852, siete meses después que Rosas fuera derrotado en el campo de batalla de Caseros. Esta revolución generó la secesión temporaria de la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. Como

uno de los resultados de esta secesión, la nueva élite porteña hizo un compromiso con la antigua oligarquía terrateniente federal ratificando las ventas de tierras de Rosas y rechazando el reconocimiento de las donaciones de tierras de tiempo de Rosas.<sup>6248</sup>

## **F-V El arrendamiento de tierras públicas.**

A fines de la década de 1850 una nueva política de reforma rural, que extiende la frontera sur a expensas de las tierras públicas e indígenas, fue observada por la creciente burguesía mercantil sin tierras como la mejor alternativa a las confiscaciones de tierras de los Rosistas.<sup>6249</sup> Su interés en una reforma agraria se originó en la perspectiva de provechos futuros más allá de la especulación de tierras. La primera herramienta maestra para disolver el monopolio estatal de tierras públicas, fue concebida a través del sistema de arrendamiento. Además, los intereses orientados hacia el ovino intentaron implementar los nuevos arrendamientos públicos para erradicar el ganado vacuno de las tierras de la frontera alentando un proceso de modernización de tierras a través de la cría de ovejas. La oveja desplazó al ganado vacuno de las mejores tierras cercanas a la capital, donde predominaba la propiedad privada, hacia la periferia fronteriza, donde prevalecían los arrendamientos públicos.

Sin embargo, el arrendamiento, como la enfiteusis antes, mostraba la misma tendencia de predominio del latifundio en pagos de colonización reciente o pagos de frontera. No obstante, es engañoso presumir que el arrendatario de la tierra pública perteneciera al mismo sector social que el propietario de tierras privado. Aunque ambos eran empresarios capitalistas porque ambos empleaban mano de obra asalariada en el mercado laboral y tomaban préstamos de dinero en el mercado de crédito, la mayoría de los arrendatarios, a diferencia del propietario de tierras privado, fracasaban en sostener su negocio rural. Los arrendamientos públicos, como la enfiteusis antes, estaban sujetos al mercado de la oferta y la demanda de arrendamientos de tierras, y experimentaron finalmente el mismo proceso de acumulación que las propiedades privadas.

Este proceso de acumulación de arrendamientos de tierras públicas puede ser observado a través del análisis de la información obtenida de los registros notariales de la Escribanía Mayor de Gobierno. Comenzando a partir de estos datos obtuve una suerte de perspectiva seccional, examinando exclusivamente los arrendamientos otorgados durante el período entre 1860 y 1867. Así, en la región nortea, los únicos dos pagos con arrendamientos públicos eran los pagos de Pergamino y Rojas. En la región central, ocho pagos poseían arrendamientos públicos. Eran Chacabuco, Salto, Carmen de Areco y los pagos de frontera de Veinticinco de Mayo, Lincoln, Junín, Nueve de Julio y Bragado. En los últimos cuatro pagos, la propiedad privada era casi inexistente. La más elevada proporción de arrendamientos de tierras públicas sucedía en la región sureña. Esta es la región de más reciente colonización en la frontera. En ella observé arrendamientos públicos en las localidades de Chascomús, en el interior del río Salado y subsecuentemente en catorce pagos al sur de este río. De entre estos catorce pagos, ocho lindaban con la frontera indígena, donde los arrendamientos públicos predominaban.

Cuanto más reciente era la colonización de un pago, mayor era la proporción de arrendamientos públicos sobre la propiedad privada. Por ejemplo, de acuerdo al Cuadro 3, en la región nortea, estaba Pergamino, un pago con una colonización más antigua que tenía una proporción de 1,23. En la región central, un pago como Veinticinco de Mayo, donde la tierra estaba dividida casi equitativamente entre propietarios y arrendatarios, la

proporción mantenida era de 1. Un pago como Bragado, en cambio, tenía una superficie de tierra en arrendamiento nueve veces mayor que la de propiedad privada. Finalmente, pagos como Lincoln, Junín y Nueve de Julio se encontraban en arrendamiento completo, no teniendo ninguna propiedad privada. En la región sureña, los pagos de Lobería y Necochea tenían las proporciones más elevadas de arrendamiento público sobre propiedad privada, seguidos por los pagos de Azul, Tapalqué, Patagones y Saladillo.

#### **F-VI Cantidad de tierra distribuida.**

Determinar la cantidad de tierra distribuida entre los arrendadores a través del sistema de arrendamiento requiere de varios cálculos. Comenzando con la sanción de la Ley de Arrendamiento de 1857 hasta 1875, el número total de arrendadores llegó a 524, y el área distribuida ascendió a 1.641 leguas cuadradas, o el 25% de la tierra total establecida hasta ese momento. Teniendo en cuenta el hecho de que muchos de estos otorgamientos fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras que habían sido previamente distribuidas en enfiteusis o arrendamientos, el número de arrendadores y el área territorial de la que el estado provincial se desprendió era mucho menor que las 1.641 leguas cuadradas mencionadas. En realidad, el área de nuevas tierras sujetas a la venta y al arrendamiento público, entre 1857 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4), es la diferencia entre la superficie arrendada (1.641 leguas cuadradas) (columna 1 del Cuadro 4) y aquella transferida (362 leguas cuadradas) (columna 2 del Cuadro 4), o un total de 1.279 leguas cuadradas.<sup>6250</sup> Consecuentemente, el área total del mercado de tierras rurales en 1875 puede ser deducido sumando tanto el área en dominio privado antes de 1857 (3.800 leguas cuadradas) como aquella de la aplicación de la ley de arrendamientos (1.279 leguas cuadradas); esto es un total de 5.079 leguas cuadradas. Por lo tanto, el área otorgada en arrendamiento o venta entre 1857 y 1875 ascendió al 25% del total de tierras ocupadas.

El proceso de arrendar nuevas tierras públicas en Buenos Aires experimentó amplias fluctuaciones durante el período entre 1858 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4). El número más grande de arrendamientos otorgados fue registrado en 1864, 1865 y 1866 como resultado de la reducción del estipendio de arrendamiento al 20%, ordenado por el Gobernador Mariano Saavedra. Hubo una aguda disminución en la cantidad de tierra arrendada en 1867 y 1868 debida a la restitución de las elevadas valoraciones fiscales de 1858 por el Gobernador Adolfo Alsina, sobre cuya base fue estipulada la recolección del estipendio. Durante los años 1869-1870 fue generada la última suba. Finalmente, comenzando en 1871, el arrendamiento de tierras públicas desapareció gradualmente, aunque hubo un breve y pequeño renacimiento durante los años 1879-1881.

#### **F-VII Ventas de tierras públicas.**

Este largo proceso de distribución de tierras públicas por medio de arrendamientos fue acompañada por sucesivas distribuciones de tierra a través de puras y simples ventas. La cantidad total de tierra pública, cuyo absoluto dominio la provincia de Buenos Aires vendió a propietarios privados, alcanzó las 2.263 leguas cuadradas en el período 1857-1875. (Véase Cuadro 5).

Con respecto a las proporciones de ventas y arrendamientos anuales de tierra pública en la provincia de Buenos Aires, durante este período, encontré, comparando las columnas 3 y 5 del Cuadro 4, el predominio de arrendamientos con respecto a ventas, con excepción de los años 1860 y 1867. Entonces, comenzando en 1872, el predominio de la

venta sobre el arrendamiento fue absoluto. Confrontando las estadísticas de los arrendamientos y ventas acumulados en las columnas 4 y 6 del Cuadro 4, es evidente que 1872 fue el momento crucial de la curva, en el que la cantidad total de tierras vendidas por vía judicial por el estado, excedió, por primera vez, la cantidad total de tierras arrendadas. Esta última diferencia nos muestra que en ese momento, por primera vez, el estado provincial agotaba sus reservas en tierras arrendadas y se veía a sí mismo en la necesidad de dirigirse a nuevas tierras públicas. Lo hizo de esa manera, fuera de la línea de frontera hasta entonces aceptada, para satisfacer la creciente demanda de tierra.

Finalmente, la mayoría de los arrendatarios individuales de tierras públicas bajo la ley de 1857, enumerados por Jacinto Oddone, fracasaron en comprar tierra cuando el gobierno la ofreció en venta en 1871. En efecto, como el Cuadro 6 demuestra, durante la década de 1860, tuvo lugar un muy dinámico proceso de tenencia de la tierra, donde la mayoría de los primeros arrendatarios perdieron sus tierras frente a los nuevos arrendadores quienes, finalmente, serían aquellos capaces de comprarlas al estado. De acuerdo al Cuadro 6, entre 1865 y 1870, fueron contratados un total de 188 transferencias de arrendamientos públicos, en suma 466 leguas cuadradas.

#### **F-VIII Patrones de inversión individual de tierra.**

Las discontinuidades en el patrón de inversión individual de tierra era otro ítem que merece analizarse. Por ejemplo, casi ninguna de las familias que compraron tierra durante el período de Rosas (1836-1839), reinvirtieron sus ganancias en tierra después de 1871. Comparando la lista que trae Oddone sobre ventas de Rosas, con los datos que he reunido, revela que ni las familias Anchorena, Alzaga, Baudrix, Cano, Dorrego, Miguens, Pacheco, Sáenz Valientes ni Vela, que eran las más grandes propietarias de tierra, compraron tierra bajo la ley de tierra de 1871. Ciertamente, el requerimiento legal para establecerse en la tierra antes de ser calificado para comprarla, obró en contra de los más antiguos y más grandes propietarios de tierra.<sup>6251</sup>

#### **F-IX Los precios de la tierra en las ventas públicas.**

La lucha contra el latifundio y la especulación continuó después en otras formas más sutiles. Una vez que terminó el debate acerca de si debía llevarse a cabo la enfiteusis o las versiones de arrendamiento, y que triunfaron los proyectos de propiedad privada, la principal cuestión para el debate fue sobre como influyeron los precios de la tierra en las ventas públicas, la especulación y el latifundio. Este debate público ocurrió cuando fue promulgada la ley del 14 de noviembre de 1864. Polarizó a los miembros del parlamento entre aquellos que eran de orientación vacuna y que promovían argumentos sociales para los precios bajos (Emilio Agrelo y Miguel Estévez Seguí) y aquellos otros que eran de orientación ovina y que defendían los precios elevados (Manuel Quintana, Lucio Mansilla y Miguel Ángel Montes de Oca).<sup>6252</sup> Mientras los precios fijos estaban asignados para los poseedores reales, las subastas públicas estaban permitidas sólo en aquellos casos donde los poseedores no podían comprar la tierra que alquilaban. Pero como en la mayoría de los casos los poseedores podían comprar la tierra que alquilaban, las subastas públicas fueron reducidas al mínimo. Por eso es que era del interés de los terratenientes porteños, de la

franja norte, mantener elevados los precios de la tierra, de manera de impedir el acceso fácil a la propiedad de la tierra a los nuevos poseedores.

#### **F-X El período lanero.**

La nueva orientación exportadora vino a caracterizar lo que se conoce como el período lanero. La producción de lana tuvo una gran expansión al mismo tiempo que el volumen del comercio exterior: de 12.000 toneladas en 1856 a 120.000 toneladas en 1884.<sup>6253</sup> Mientras tanto, los precios del tasajo en Río de Janeiro disminuyeron un 42% entre 1859 y 1861, de 4.750 reis (\$15 pesos plata) por arroba (alrededor de 11 1/2 kg.) a 2.750 reis (\$9 pesos plata).<sup>6254</sup> La caída en la demanda del tasajo, para alimentar a los esclavos cubanos y brasileros, fue resultado de la disminución en la demanda de azúcar por el mercado de Estados Unidos debido a la Guerra Civil en ese país.

Comparando por pago la proporción de vacunos sobre ovinos y la proporción de otorgamientos y rotaciones de derechos dominiales sobre las ventas públicas y privadas, puedo confirmar el creciente proceso de modernización de tierras a través del ovino. La proporción de vacunos sobre ovinos disminuyó en áreas cercanas al puerto capitalino donde la propiedad privada predominaba, desplazando al vacuno desde las mejores tierras a la periferia, donde los arrendamientos públicos predominaban.<sup>6255</sup> Las tierras de frontera distribuidas en arrendamientos públicos, fueron encontradas inadecuadas para el ovino hasta tanto los pastos duros fueran devorados a sus anchas por el vacuno.<sup>6256</sup> En la región central, en los pagos de Junín y Bragado, a pesar de tener una elevada proporción de tierras en arrendamiento público por sobre las tierras en propiedad privada, el ovino predominaba. En contraste, en los pagos de Lincoln y Nueve de Julio, el patrón de establecimiento fue de tipo tradicional, donde el número de vacunos era casi el doble del número de ovinos. En la región sur, los únicos pagos donde ambas proporciones no tenían correlación eran Pila y Necochea. Mientras la proporción en Pila de arrendamiento público sobre propiedad privada estaba por debajo de uno -0,15-, su proporción de vacunos sobre ovinos estaba por encima de uno -1,1. Esta falta de correlación puede ser explicada por la naturaleza de las tierras de Pila, donde prevalecían los pastos duros, las tierras bajas, y las inundaciones. Asimismo, mientras la proporción en Necochea de arrendamiento público sobre propiedad privada estaba por encima de uno: 1,23, su proporción de vacunos sobre ovinos estaba por debajo de uno: 0,16.

Los valores de mercado de las tierras en enfiteusis y arrendadas también variaban de acuerdo a si predominaba el vacuno o el ovino. Cuanto más al sur y más orientado al vacuno estaba un pago, más barato era el valor de la legua cuadrada arrendada. Esta afirmación puede ser probada por medio de alguna de las transacciones registradas en presencia de notarios públicos, que mantenían un registro de sus valores. En efecto, por sólo cinco números dados en los datos que he recogido acerca de cinco diferentes pagos de la provincia de Buenos Aires -Bolívar, Junín, Lobos, Tandil y Tapalqué-, en los pagos localizados fuera de la línea de frontera, como Junín, Lobos y Tandil, donde el ovino predominaba, el valor de mercado de la legua cuadrada arrendada ascendía a cifras extremadamente elevadas, en el orden del 50% o 60% del valor de mercado de la legua cuadrada vendida.

#### **F-XI Impacto de las crisis económicas.**

Las crisis económicas jugaron un rol significativo en el debilitamiento de las políticas de reforma rural, causando una disminución en la tasa de especulación y reforzando el latifundio. Un descenso en la tasa de especulación refuerza necesariamente el latifundio porque una más reducida cantidad de postores para la misma cantidad de tierra promovía un mercado de compradores. Las crisis económicas mundiales forzaron a los más débiles propietarios de tierra y arrendadores a irse del mercado. En forma similar, las crisis internas, como las guerras civiles, las sequías y los ataques indígenas socavaron la posición de los pequeños propietarios de tierra. De esta manera, contribuyeron al fracaso de las políticas de reforma rural. La gran sequía de 1865 y la disminución de la protección en la frontera indígena a causa de la guerra contra el Paraguay, provocaron en 1865 una fuerte caída en las ventas de tierra pública, así como en la especulación en el mercado de tierras rurales. Entre los factores que causaron la crisis de 1866, la escasez de circulante fue la más importante. Olivera señaló que desde 1864, la cantidad de circulante disponible comenzó a volverse escasa. La inflación, en cambio, no fue un serio riesgo antes de 1866. Debido al enorme incremento de producción, agrega Olivera, la consecuencia de esta escasez fue agravada, siendo un índice de ello la elevada tasa de interés del 18% y 24% anual, que fue debitada por los préstamos en 1866.<sup>6257</sup> Pero cuando la crisis estaba en su peor momento y la bancarrota de los poseedores de tierra era inevitable, nuevas evaluaciones de tierra fueron ordenadas en 1866 por el nuevo Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina, quien reestableció los valores que existían antes de 1863, obligando a los propietarios de tierra a pagar un 20% más en contribuciones directas.<sup>6258</sup>

Como resultado de esta crisis económica, la cantidad de leguas cuadradas puestas a la venta en Buenos Aires en 1866 cayó un 82% y el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó un 52% (Véase Cuadro 7). Los valores de tierras rurales fueron golpeados por la crisis a diferentes niveles. Mientras el pago agrícola de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, sufrió una caída del 64%, el pago ovejero de Marcos Paz experimentó una disminución del 42%. Los pagos ganaderos como Tapalqué y Balcarce en la provincia de Buenos Aires registraron una caída del 38% y 31%, respectivamente. Por otra parte, diversos factores compensaron parcialmente los efectos locales de la crisis. Aquellos factores fueron la venta de tierras públicas, que proveyó de ingresos al tesoro público, la provisión del ejército durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que produjo un mayor incremento en la industria y el comercio, y los préstamos externos, que consolidaron la circulación de papel.

## **F-XII Auge ficticio de precios de tierra.**

En el período de entre-crisis entre 1867 y 1874 ocurrió un auge ficticio de precios de tierra. El exceso de crédito internacional más la excitación causada por la derrota militar de Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza y la de los indios ranqueles bajo el liderazgo de Calchurá en la batalla de San Carlos, provocó una especulación ingobernable en tierras rurales. El precio promedio por cada legua cuadrada subió, como muestra el Cuadro 2, un 88% en el mercado privado de tierras rurales y un 54% en los mercados de tierras rurales, tanto público como privado, después de 1867. La tierra en Las Flores, Bragado, Balcarce, General Alvear, Salto y Pergamino produjo, de acuerdo a los datos que he recogido, los precios más elevados. Igualmente, la tierra en Lincoln, Tapalqué y los lugares desérticos experimentó un elevado número de rotaciones. Además, como resultado de la ley de tierras de 1871, la política de reforma rural, que comenzó en 1858, recibió un fuerte impulso. Un total de 615 ventas en 1.402 leguas cuadradas a un tamaño promedio de 2,28 leguas cuadradas por cada propietario de tierras fueron vendidas en el período 1872-1873, un 35%

menos que en la superficie promedio predominante en los más recientemente establecidos pagos sureños (Véase Cuadro 8). Esta ley representa el pico de las políticas de reforma rural iniciadas por Mitre en 1858.

### **F-XIII La crisis financiera de 1874.**

La crisis financiera de 1874 precipitó el fracaso de la política de reforma rural intentada por la ley de tierras de 1871. Esta crisis, como otras, fue acelerada por las interrupciones de préstamos externos. El balance de comercio para los cinco años previos (1869-1873) se cerró en 1874 con 94 millones de pesos papel en rojo. La tasa de interés en el mercado de dinero subió al 15%, y la inmigración de ultramar descendió un 65%, de 40.000 a 14.000 hombres. Además, una sequía causó una tasa de mortalidad entre el ganado del 28%.<sup>6259</sup> Como resultado, los valores de tierra experimentaron un fuerte deterioro. El cuadro 2 muestra como el número de transacciones cayó un 54%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 66%, y el volumen de dinero invertido cayó un 70%. Consecuentemente, los precios de la tierra también experimentaron el impacto de la crisis. El precio de la tierra en los pagos de Olavarría y Tapalqué cayó un 55% y un 50%, respectivamente. Los pagos de Arrecifes (hoy Bartolomé Mitre), Brandsen y Juárez siguieron la lista con disminuciones del orden del 39%, 30% y 29%, respectivamente. El pago de Patagones experimentó una caída del 25% y el pago de Nueve de Julio, un 13%. El número de bancarrotas se incrementaba cada día. El Cuadro 9 menciona los nombres de aquellos nuevos propietarios de tierra que compraron bienes raíces rurales a los vendedores en bancarota. Eran tales las condiciones económicas que el presidente Avellaneda se sintió obligado a poner orden a una economía que producía el "hambre y sed del pueblo argentino". Este hecho podría fácilmente explicar el apoyo popular de la revuelta mitrista en 1874. Para compensar los efectos de la crisis económica mundial, Avellaneda formuló su famosa ley de tierras e inmigración sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 1876.

### **F-XIV Ley provincial de 1878 y campaña militar de Alsina.**

Finalmente, las políticas de reforma rural que iniciaron los arrendamientos de Mitre en 1857, alcanzaron su culminación con la ley provincial de diciembre de 1878 y la campaña militar de Alsina. Esta última ley intentó favorecer, por razones políticas, a los verdaderos pobladores, terminando con los especuladores que no compraban, ni arrendaban, ni pagaban nada por ella, impidiendo la acumulación de grandes superficies en pocas manos. Para tal propósito, se fijó un plazo impostergable a los pobladores para solicitar compras de tierra, a condición de que hubieran mantenido sus posesiones con 300 cabezas de ganado, desde un año antes de la promulgación de la ley. Además, la ley prohibía a cada propietario de tierra comprar más de 8.000 hectáreas.<sup>6260</sup>

Pero las devaluaciones monetarias distorsionaron el fin progresista de la ley y de ello resultó una fuerte especulación en tierras. En efecto, por un lado la moneda nacional experimentó en 1878, con respecto a 1867 y 1871, una devaluación del 28%, tornándose la inversión en tierras en un seguro contra la devaluación. Por otra parte, el precio fijado en 1878 para la tierra pública en el interior de la línea de frontera de 1858, fue el mismo que el fijado en la ley de enero de 1867. Los bajos precios fijados por esta ley generaron una gran demanda de tierras.<sup>6261</sup> Como resultado de aquellos bajos precios, el precio promedio por legua cuadrada disminuyó en 1879 cerca del 46% con respecto a 1878. La cantidad

total de tierras públicas incorporada en el mercado de tierras rurales por virtud de la ley provincial alcanzó entre 1879 y 1886, la cantidad de 1.895 leguas cuadradas españolas o 2.047 leguas cuadradas republicanas, distribuidas entre 682 nuevos propietarios de tierra, o a un promedio de tres décimas de legua cuadrada por cada uno.

#### **F-XV La campaña militar de Roca.**

Una vez que las políticas de reforma rural y las estrategias militares para conquistar las tierras indígenas, implementadas por el gobierno provincial, fracasaron en satisfacer la creciente demanda de los intereses capitalistas internacionales, el Gobierno Nacional comenzó una política de contrarreforma rural. Consistió, esencialmente, en la campaña militar de Roca respaldada por la ley nacional del 5 de octubre de 1878. El aspecto contra-reformista de la misma consistía primeramente, en que los legisladores abandonaban las restricciones previas sobre los límites de tamaño y los requisitos de poblamiento. Esta ley nacional buscaba poner en práctica la nueva línea de frontera establecida por la ley 215 del 23 de agosto de 1867. También estableció los límites para cuatro provincias y para el territorio federal, así como anticipó el método de obtención de los recursos financieros necesarios para conquistar las tierras indígenas. Para ese propósito, aquellas provincias fronterizas con tierras indígenas, cedieron de común acuerdo al estado nacional el dominio de las tierras a ser conquistadas.<sup>6262</sup> El gobierno nacional, con el objetivo de financiar la campaña militar, fijó el precio de venta de cada legua cuadrada al increíble bajo precio de \$400 pesos plata, pagables exclusivamente en bonos. Para el propósito de conquistar aquellas tierras, el gobierno nacional emitió \$1.600.000 pesos en bonos de \$400 cada uno, pagables en cuotas de \$100 cada tres meses, con un interés del 6% y redimibles con la adjudicación en propiedad de lotes de tierra de 5.000 hectáreas o de dos leguas cuadradas cada uno, dentro de un término de cinco años.<sup>6263</sup> Cuando las tierras fueron medidas y divididas al mismo tiempo en que la línea de frontera avanzaba, el suscriptor podía pedir el reembolso de sus bonos indicando los lotes que quería.<sup>6264</sup> En diciembre de 1880, las ventas de tierras públicas fueron suspendidas porque todos los gastos que la conquista del desierto requirió, estaban completamente cubiertos. En 1881, las tierras cedidas, que la nación no había empleado, fueron devueltas a la provincia.<sup>6265</sup>

#### **F-XVI El mercado de tierras rurales.**

La cantidad total de tierras incorporadas al mercado de tierras rurales por virtud de la Ley Nacional alcanzó, entre 1881 y 1886, de acuerdo a los registros de la Escribanía General de la Nación, 2.728 leguas cuadradas. Esta cantidad de tierras nuevas fueron distribuidas entre 610 propietarios de tierra, o a un promedio de 4 1/2 décimas de legua cuadrada por cada propietario de tierra. Más precisamente, las nuevas tierras conquistadas consistieron en los nuevos pagos de Villarino, Patagones, Adolfo Alsina, Saavedra, Trenque Lauquén, Guaminí, Rivadavia y Puán, así como los territorios nacionales de La Pampa, Río Negro y Neuquén. El proceso de registrar los nuevos títulos no fue completado del todo en el mismo año. El Cuadro 8 muestra que en 1881 un total de 272 lotes fueron vendidos a 126 propietarios de tierra, en 1882 un total de 392 lotes fueron vendidos a 163 propietarios de tierra y en 1883 un total de 450 lotes fueron vendidos a 249 propietarios de tierra. Además, el Cuadro 10 nos muestra una lista de los más grandes compradores con la correspondiente cantidad de lotes comprados. Los casos de Saturnino Unzué (h), Diego de Alvear, Eduardo Casey, Antonino Cambaceres, Tomás, José y Juan Drysdale, Marcelino Ugarte, etc., son lo suficientemente ilustrativos para mostrar la manera descubierta en que

los capitalistas dieron origen a sus vastos latifundios. Finalmente, el tamaño promedio de la tierra vendida por el gobierno nacional fue 50% más grande que la vendida por el gobierno provincial.

## **F-XVII La especulación y el ausentismo.**

Las políticas de contrarreforma rural dieron lugar a la especulación y el ausentismo. El resultado inmediato fue un proceso gradual y creciente de elevación en espiral de los precios de la tierra. Este proceso fue debido en parte, a un incremento del endeudamiento externo e interno. Entre 1881 y 1882, alrededor de 41 millones de pesos oro fueron contraídos por el gobierno nacional para pagar los servicios y cancelaciones de la deuda federal con el banco de la provincia de Buenos Aires (procedente de la crisis de 1874-1876). En 1883, el Congreso nacional votó un préstamo para Obras Públicas por 30 millones de pesos oro a un 5% de interés y en 1884 hubo otro de 12 millones de pesos oro para la canalización del Riachuelo. La deuda consolidada, externa e interna, era de 57 millones de pesos en 1880 y alcanzaría 122 millones, cuatro años después.<sup>6266</sup> Del total de 476 millones de pesos oro tomados prestados en el exterior entre 1884 y 1890 y la deuda de 708 millones de pesos oro acumulados hasta ese momento, los préstamos públicos comprendían 35%, los ferrocarriles: 32%, y los bonos hipotecarios sobre tierras, llamados cédulas: 24%, cada uno de los que podría afectar en forma diferente los bienes importados y el crecimiento de largo plazo de la producción y las exportaciones.<sup>6267</sup> A diferencia de otros países periféricos, sólo Argentina pudo colocar sus bonos hipotecarios (cédulas), cotizados en papel moneda, en la bolsa de valores europea.<sup>6268</sup> Para tener una idea aproximada del grado de especulación que existía en el mercado de tierras rurales, los préstamos dados en la forma de cédulas representaron, 39%, 49% y 42% del valor total de la tierra de Buenos Aires en 1887, 1888 y 1889, respectivamente (Véase Cuadro 11). Como resultado de esta inyección de préstamos externos, los valores de la tierra, expresados en pesos oro, ascendieron casi ocho veces entre 1879 y 1889. El precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor un 78% en 1884 con respecto a 1883, un 51% en 1887 con respecto a 1886, y un 38% en 1889 con respecto a 1888. Con respecto a 1881, el precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor casi seis veces, pero con respecto a 1879 lo incrementó casi ocho veces (Véase Cuadro 2).

La especulación en tierras fue debida a un incremento en la presión de la población sobre la tierra. Considerando la intensidad de esta presión, causada esencialmente por la inmigración exterior y la magnitud del proceso re-distributivo, encontré que mientras la proporción de los nuevos propietarios sobre la inmigración neta era decreciente, la densidad de población era creciente. En efecto, la proporción de propietarios de tierra sobre población en la región sur alcanzó el 1% en 1839, el 0,4% en 1855 y el 0,27% en 1869. Comenzando en 1870, si agrego la inmigración neta a la población real, la proporción de propietarios de tierras sobre la población total se vuelve aún más baja. En efecto, en 1872-1873, la proporción entre 915 propietarios de tierras (véase Cuadro 8), y 386.000 habitantes, de los que 300.000 eran pobladores y 86.000 inmigrantes netos, alcanzó al 0,24%.<sup>6269</sup>

## **F-XVIII La densidad demográfica rural.**

A fines de la década de 1860, la organización social de un establecimiento ganadero, el sistema dominial de la tierra de grandes extensiones, así como el tipo de producción empleado, no ayudaban al crecimiento demográfico. En las regiones de

frontera, donde prevalecía el latifundio, la densidad de población fue en la década de 1860 más baja que en las zonas de antigua colonización donde el ovino prevalecía. El movimiento demográfico hacia las áreas nuevas era escaso ya que eran ocupadas por ganado vacuno, que requería menos mano de obra. De acuerdo al Cuadro 12, en 1867, en la región sur, la densidad de población (índice= 30) era menor que en las otras dos regiones, debido al predominio del latifundio (extensión promedio de propiedades rurales= 6.044 hectáreas). Sin embargo, la densidad de población de la región central era mayor (índice= 99), a pesar del hecho de que en esta región había más subdivisión de tierra que en el norte (extensión promedio de propiedades rurales en la región norte= 1.000 hectáreas, y en la región central= 1.800 hectáreas). Esto fue debido al hecho que la producción ovina era más intensa en los pagos del centro donde una cantidad mayor de mano de obra era necesaria.

A mediados de la década de 1880 un cambio del vacuno al ovino en los pagos del oeste y del sur, incrementó sus densidades de población y de igual manera en los pagos del centro, un cambio de la oveja a la vaca disminuyó sus densidades de población.<sup>6270</sup> Por ejemplo, la densidad de población rural de Buenos Aires, de acuerdo al Cuadro 12, se incrementó un 8% en 1885 con respecto a 1869, de 49 habitantes por legua cuadrada a 53 habitantes por legua cuadrada. Los pagos del sur retuvieron la carga más pesada, aumentando un 30%, mientras que los pagos norteños se incrementaron sólo un 7%. Los pagos centrales, en cambio, a causa del desplazamiento de la oveja al oeste y al sur, disminuyeron un 19%. Contrariamente, la proporción de nuevos propietarios de tierra sobre inmigración neta en el primer quinquenio de la década de 1880 disminuyó. En efecto, esta proporción descendió casi un 50%, de 0,7% a principios de la década de 1870 a 0,33% en la década de 1880, o bien, la proporción entre 910 propietarios de tierra (véase Cuadro 8) y 279.000 inmigrantes netos.<sup>6271</sup>

## **F-XIX El incremento de la inmigración extranjera.**

Además, el incremento de la producción de granos requería grandes contingentes de inmigrantes extranjeros. Como resultado de ese movimiento migratorio, la densidad de población rural de Buenos Aires, como muestra el Cuadro 12, se incrementó un 43%, de 53 habitantes por legua cuadrada en 1885, a 76 habitantes por legua cuadrada en 1892. Los pagos maiceros norteños mostraron el mayor crecimiento, con un 53% de incremento, seguido por los pagos trigueros sureños con un 44% y, finalmente, los pagos centrales con un 31%.

En conclusión, como los inmigrantes estaban impedidos de adquirir tierras en lugares donde los granos pudieron haber sido fácilmente transportados, a causa de los muy elevados precios de la tierra, dentro de una distancia donde podían alcanzar las terminales ferroviarias, tuvieron que depender de contratos de arrendamientos privados muy caros.<sup>6272</sup> Los inmigrantes podían participar en el mercado de arrendamiento pero prácticamente no tenían posibilidad de ninguna clase de intervenir en el mercado de ventas. El hecho hizo que los contratos de arrendamiento de parcelas en dominio privado se volvieran sujeto de especulación para los inmigrantes que deseaban acumular la mayor superficie posible en tierras arrendadas. Una vez que monopolizaron gran cantidad de tierras arrendadas las subarrendaron a otros inmigrantes. De acuerdo al Censo de 1895 de la provincia de Buenos Aires, sobre 8.179 chacras, 40% eran trabajadas por sus propietarios y 52% por

poseedores. Este proceso intensificado de tenencia de la tierra implicaba un incremento sustancial del precio del mercado de los contratos de arrendamiento.<sup>6273</sup>

Los valores de la tierra en términos relativos se fueron a las nubes o se estancaron dependiendo de si las líneas férreas penetraban en ellas o no. El recorrido ferroviario se había triplicado desde fines de la década de 1860. En efecto, de las 380 millas de vías en 1869 se incrementaron a 1.570 millas de vías en la década de 1880.<sup>6274</sup> Entre los pagos sureños, por ejemplo, de acuerdo a mi banco de datos, el pago de Cañuelas experimentó en la década de 1880, un 35% de incremento en los valores de la tierra, mientras que en 1885, a causa de la inauguración ferroviaria, los valores de la tierra subieron 16 puntos, es decir al 51%. En forma similar, en Ayacucho, los valores de la tierra en el quinto cuartel subieron 19% en la década de 1880 mientras que, después de la inauguración del ferrocarril en 1880, subieron 37 puntos, al 56%. Las tierras de Tandil, por ejemplo, subieron 93% en la década de 1880. Luego de la llegada del ferrocarril en 1883, la tierra subió allí 145% en el segundo cuartel y cuatro veces en el octavo cuartel. Las tierras de General Alvear subieron un porcentaje de 36% en los '80 mientras que con la inauguración del ferrocarril en 1882, los valores de la tierra subieron un promedio de 2 1/2 veces. Las tierras de Nueve de Julio subieron un promedio de 53% en los '80 y luego que el ferrocarril fuera inaugurado en 1882, los valores de la tierra subieron 34 puntos, es decir el 87%. Finalmente, en Tres Arroyos, mientras subieron un promedio de 37% en los '80, luego que el ferrocarril fuera inaugurado en 1886, los valores de la tierra se doblaron.

Finalmente, la crisis de 1890 fue el resultado parcial de una política de contrarreforma rural iniciada diez años antes. El auge de tierras que duró casi una década (1879-1889), más la repentina interrupción de los préstamos externos, fueron los principales elementos que trajeron la crisis de 1890. Esta última crisis golpeó duramente al mercado de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 2 muestra que en 1890 el número de transacciones disminuyó 49%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas disminuyó 58% y el volumen de dinero invertido disminuyó 60%. La crisis golpeó más duramente en el mercado de tierras urbanas que en el mercado de tierras rurales. Por ejemplo, el mercado de tierras rurales cayó 67% mientras el mercado de tierras rurales cayó siete puntos. El precio promedio general por legua cuadrada cayó 42%, de \$31.727 pesos plata en 1890 a \$18.545 pesos plata en 1891. Teniendo en cuenta los valores de la tierra, de acuerdo a las cotizaciones de los bonos hipotecarios de tierra provinciales en la bolsa de valores de Buenos Aires, como Luis Sommi ha mostrado, estos también disminuyeron 42%.<sup>6275</sup>

Las tierras nuevas fueron golpeadas más seriamente por la crisis que las viejas. Los valores de la tierra de casi todas las nuevas tierras cayeron más abajo del promedio. Esto sucedió porque las incumplidas expectativas especulativas de las subas del precio de la tierra ocurrieron esencialmente en tierras nuevas. Ese fue el caso, de acuerdo a mi banco de datos, de los pagos de Trenque Lauquén, Puán, Patagones, Villarino, General Villegas, Carlos Tejedor, Saavedra, General Pinto, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Leandro Alem y General Alvear. Estos pagos donde los valores de tierra cayeron por debajo del promedio eran, de acuerdo a mi banco de datos, las tierras viejas, como aquellas de Rojas, Arrecifes, General Lamadrid y Caseros. Además, el Cuadro 13 menciona los nombres de los prósperos empresarios que compraron muy barato fincas rurales a los vendedores endeudados.

## **Conclusión**

La especulación en tierras fue responsable por el fracaso de la intentada transición de las vías pre-capitalista y junker a la vía campesina del desarrollo del capitalismo de las diferentes políticas de reforma rural implementadas en la Argentina del siglo XIX. En efecto, la especulación en tierras alentó elevados valores de tierra y una creciente tasa de concentración de tierras. El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica también mucho de la suba de los valores de tierra en cada una de las políticas de reforma rural implementadas. La suba internacional en los precios de la lana fue responsable de una gran parte del auge del precio de la tierra bajo el sistema de arrendamiento (1857-1874). Comparando en el Cuadro el precio promedio por legua cuadrada del mercado privado de tierras rurales con el público, mientras que bajo el modelo de reforma de enfiteusis los valores de la tierra se incrementaron 6,6 veces, bajo el modelo de reforma de Mitre se incrementaron menos de la mitad, tres veces. La movilidad internacional del capital (préstamos externos), el trabajo (presión de la población) y la tecnología (inversiones ferroviarias) fueron también responsables por valores aún mayores de la tierra.

En cuanto a los efectos que la dependencia en una orientación exportadora tuvieron en los índices de concentración de la tierra de los modelos de reforma rural, durante el modelo de reforma enfiteutico (1820-1840), la proporción de la monopolización de tierra se incrementó levemente, y en tanto que la diversificación de la estructura económica generada por la producción lanera a fines de la década de 1860 y 1870 obtuvo un balance favorable en contraste con el período previo del tasajo (es decir, el precio de la monopolización de la tierra fue menor), el cambio subsecuente en la estructura de la producción en favor de las exportaciones de carne congelada incrementó la proporción del latifundio. Mientras bajo el modelo de reforma de la enfiteusis el tamaño promedio en enfiteusis (6,5 leguas cuadradas) fue casi cinco veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,4 leguas cuadradas), bajo el modelo de reforma de Mitre el tamaño promedio en arrendamiento (3,13 leguas cuadradas) disminuyó a sólo 2 1/2 veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,27 leguas cuadradas). Por el contrario, en el período de contrarreforma (1878-1890), el tamaño promedio en propiedad privada subió 73%, de 1,27 leguas cuadradas, bajo el modelo de reforma rural de Mitre (1857-1875) a 2,2 leguas cuadradas bajo el período de contrarreforma de Roca (1878-1890). En forma similar, encontré que bajo la política de reforma de Mitre, el tamaño de superficie promedio de una finca disminuyó. La superficie promedio en el sistema de enfiteusis era más grande que en el equivalente en el sistema de arrendamiento. Mientras que la unidad de enfiteusis promedio alcanzó 7 1/4 leguas cuadradas, la unidad de arrendamiento promedio alcanzó 4 1/3 leguas cuadradas.

Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio externo de Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, concluyo que los mayores retrasos ocurrieron en 1851, 1866, 1875-1876 y 1890-1891. La crisis de 1857, aunque no tan crítica en Latinoamérica como lo fue en Europa, tuvo una leve repercusión en Buenos Aires. Las crisis de 1866 y 1890, aunque demoraron la especulación de tierras así como fortalecieron el latifundio, no fueron tan profundas como la experimentada en 1874. Mientras que el mercado de tierras rurales de Buenos Aires experimentó en 1874 una disminución del 44% y en 1890 una disminución del 60%, cayó 70% en 1874. Estos resultados significaban que la vinculación entre el mercado de tierras de Buenos Aires con el mercado mundial fue más cercana en la segunda mitad del siglo que en la primera.

Además, la resistencia indígena y los desastres naturales acentuaron el fracaso de las políticas de reforma rural. En ese sentido es notable advertir la elevada correlación existente entre los ataques indígenas y las extensas sequías. Esto pudo ser observado en 1856-1859, y en 1874. La única instancia en que la correlación estadística no fue mantenida fue en 1851 debido a la política de "pacificación" de Juan Manuel de Rosas con respecto a las tribus indígenas. En efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a los indios, extirparon en ese momento cualquier riesgo de ataque indígena. En el primer ataque indígena en la década de 1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron o fueron robadas en otro ataque indígena, y en el último ataque en 1857, fue originada una tasa de mortalidad de 28%. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó 56%, y en el último ataque no sólo la ley en arrendamientos públicos no tuvo éxito en arrendar la tierra pública, sino también el mercado de tierras privado cayó alrededor del 50%.

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de compraventas, protocolizadas entre 1852 y 1900.<sup>6276</sup> Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de ; en la banda norte de la Matanza a ; en las cabezadas de la Magdalena, a ; en la banda sur del pago de Luján, a ; y en el pago de San Andrés de Giles, a .

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial.

Finalmente, el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas. Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada,

en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella.

### **Epílogo de la Sección III-B**

En esta sección, donde estudiamos las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, encontramos que el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas.

Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto.

Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis

ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella.

### **Sección III-C            Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico**

La precondition esencial para la estabilidad y viabilidad de cualquier régimen político consistió siempre en lograr el pasaje de la heterogeneidad y desunión entre las elites a la unidad u homogeneidad consensual que potencie su legitimidad disminuyendo la incertidumbre provocada por la marginación o exclusión de la oposición.<sup>6277</sup> El principio es entonces de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>6278</sup> Mientras la homogeneidad y legitimidad de las elites estaba alimentada por pactos, treguas y coaliciones, la heterogeneidad estaba marcada por las políticas de confrontación y faccionalismo. A ese respecto, la historia argentina cuenta con cuatro grandes corrientes políticas que padecieron procesos de marginación histórica: el Unitarismo (1831-1852), el Mitrisimo (1874-1891), el Radicalismo (1891-1912, 1930-1936) y el Peronismo (1955-1973).

Habiendo en la sección anterior tratado las peregrinaciones, las anexiones y las expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, en la tercera sección nos dedicaremos a investigar las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico-republicano, que desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: los pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-31), los pactos implícitos para garantizar la organización del estado-nación (1852-1862), la Conciliación o interregno de paz forzada entre fracciones dominantes (1877-80), la *Pax Roquista* o paz beligerante (1881-1886), y el Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición.

#### **Capítulo III-C-7**

##### **Pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-1831)**

#### **Indice**

- G-I    Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820)
- G-II   Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la dominación caudillesca (noviembre de 1820)
- G-III   Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña (I-1822)
- G-IV   Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo

A diferencia del período absolutista (1600-1808), cuando lo que primaban eran los pactos dinásticos entre linajes rivales (Pacto de Familia), a partir del colapso del imperio español se había producido lo que denominamos Metanastasis o desorden interno generalizado, y que en Argentina se conoce como el período de la Anarquía, cuando la dominación no era ya de orden monárquico pero sí primero corporativo-capitular o juntista (Cabildos y Junta de Representantes), y luego carismática o caudillesca. Asimismo, a

diferencia de los acuerdos y conciliaciones que prevalecieron durante la Organización Nacional y la Generación del 80, en que la dominación no era de orden carismático pero sí legal-constitucional; en el período de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos Aires (1852-62), lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, Cuadrilátero, San Nicolás).

Fragmentado el espacio político rioplatense con el colapso del imperio español, la legitimidad tradicional del monarca pasó a ser apropiada por las juntas o corporaciones municipales, de modo tal que las jurisdicciones que antes fueron sufragáneas de ciudades cabeceras se autonomizaron adquiriendo vida político-estatal propia.<sup>6279</sup> Este nuevo y heterogéneo mosaico político constituía un embrionario modelo westfaliano con soberanías internas y externas que incluían los respectivos monopolios de violencia legítima (militar y naval) y sus prácticas diplomáticas, y exigía para la convivencia de sus integrantes equilibrios de poder mediante un mínimo de acuerdos defensivos y ofensivos.<sup>6280</sup> Se obligaban entre sí a resistir cualquier invasión extranjera al territorio de alguna de los estados contratantes, o cualquier ataque de otras jurisdicciones que no participaban del acuerdo.

De esos pactos inter-estatales siempre existían unas jurisdicciones que resultaban favorecidas y otras que se perjudicaban en la mesa de negociaciones. Los estados talasocráticos se encontraban con mayores perspectivas de imponer sus criterios por dominar un hinterland y ser intensivos en capital. La talasocracia era compatible con muchas formas distintas de gobierno, ya se tratara de monarquías o de repúblicas.<sup>6281</sup> Por el contrario, los estados telurocráticos por ser intensivos en coerción y contar con abundante población y escaso capital eran menos propensos a salir exitosos en la contienda. Todos los protagonistas de estos acuerdos eran caudillos o señores de la guerra que --a diferencia de la oficialidad mercenaria prevaleciente durante el orden imperial absolutista-- contaban en sus respectivos distritos con una cierta dosis de legitimación carismática y de representatividad corporativa, acompañados por contingentes o conglomerados armados no territoriales (*symmakhías*), sus estados mayores y sus cuerpos diplomáticos, cuyas estrategias podían ser ofensivas o defensivas.<sup>6282</sup> Estas dosis carismáticas y representativas debían ser revalidadas permanentemente en los campos de batalla o en las mesas de negociación.

Por lo general, las rivalidades entre los caudillos no tenía fin y al no ser susceptibles de institucionalización alguna debían necesariamente resolverse en el campo de batalla. Tampoco los diversos caudillismos eran de características semejantes, pues los había de naturaleza telurocrática, es decir de base territorial (Bernabé Aráoz y Alejandro Heredia en Tucumán, Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Estanislao López en Santa Fe, Rodríguez de Francia en Paraguay, Rosas en Buenos Aires, y Urquiza en Entre Ríos), y otros que eran meras *symmakhías* o contingentes armados no territoriales (Güemes, Artigas, Ramírez, Carrera, Lavalle y Cáceres). Incluso, se podría aventurar que en ciertos casos se dieron evoluciones y en otros involuciones, transitando de la telurocracia a la *symmakhía* (casos de Güemes y Ramírez); y de la *symmakhía* a la telurocracia. Esos últimos habrían sido los casos de López, Rosas, Quiroga y Rivera, que de jefes de tropas irregulares y Comandantes de Frontera devinieron en Gobernadores de estados autónomos. También se habría registrado en la historia de las guerras y las *symmakhías* el doble proceso de anábasis (ascenso, avance, conquista o guerra ofensiva) y katábasis (descenso, retirada o guerra defensiva).<sup>6283</sup> Ese fue el caso del Ejército Expedicionario del Norte en la Guerra contra los realistas enquistados en el

Alto Perú (1811-20). También el del Ejército de los Andes cuando cruza la cordillera y luego desembarca en Lima (1817-20), y el del Ejército Republicano en la Guerra contra el Imperio esclavista de Brasil (1827-28). Si bien en esta última, cuando luego del Tratado de Paz o Armisticio se produce la retirada con los respectivos golpes de estado de Paz y Lavalle en Córdoba y Buenos Aires (1828), en el Ejército de los Andes la retirada se expresa en el renunciamento de Guayaquil (julio de 1822). Y en el trágico caso del Ejército Libertador liderado por Juan Lavalle en 1840, este habría experimentado dicha transición desde una anábasis (avance cuando baja de Corrientes y entra en la provincia de Buenos Aires) a una katábasis (cuando se retira hacia el norte con sucesivas y repetidas derrotas).<sup>6284</sup>

Los triunfadores en estas lides, casi siempre las telurocracias, potenciaban sus dotes carismáticas de base agraria-campesina y de representación corporativa, mientras que los derrotados --por lo general los connotados como *symmakhías*-- la perdían yéndoles en ello la vida, o la permanencia en el pago, la que se tornaba en exilio u ostracismo. Aunque existieron caudillos que eran de filiación Unitaria (el caso de Taboada en Santiago del Estero), por lo general la mayoría de ellos se identificaban con la causa Federal, dado que con la misma podían preservar su monopolio de la violencia legítima, defender la religión de estado contra los procesos secularizadores, oficiar de mediadores entre las elites locales faccionalizadas, exhibir su patriarcalismo con relación al “bajo pueblo”, y desplegar su rencor telurocrático contra el poder talasocrático.

Habiendo entonces colapsado el imperial-absolutismo hispánico, y habiéndose fragmentado el espacio colonial en multitud de jurisdicciones estatales autónomas, tuvieron lugar nuevos modelos de legitimación, consistentes en *symmakhías* (contingentes armados no territoriales que experimentaban el doble proceso de anábasis y katábasis) y caudillismos de tipo telurocrático (territorial o continental), reconocidos en los Pactos preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 (Pilar, 1820; Benegas, 1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 1852; San José de Flores, 1859); y en la legitimidad del estado confederado con cabecera en Paraná o San Nicolás (1852-61).

## **G-I Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820)**

En el caso del Río de la Plata, cuando ya se había producido la Revolución de Riego en España (I-1820) pero aún no había desembarcado San Martín en el Perú (IX-1820), y luego de haber quedado disuelta la unidad nacional con la sublevación del Ejército del Norte en Arequito, habiéndose opuesto San Martín a retornar con su ejército, y derrotada la provincia de Buenos Aires y su general José Rondeau en la batalla de Cepeda por los ejércitos de Entre Ríos y Santa Fe, los estados desprendidos de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían organizado sus propias milicias, pactaron entre sí un acuerdo de paz y amistad, conocido como el Tratado de Pilar.<sup>6285</sup>

En dicho Tratado de febrero de 1820, los gobernadores de Santa Fe (Estanislao López), Entre Ríos (Francisco Ramírez), y Buenos Aires (Manuel Sarratea) firmaron una “paz perpetua”, con exclusión de la Banda Oriental, cuyo jefe el Defensor de los Pueblos Libres José Artigas había sido derrotado un mes antes, en enero del año 20, por el ejército real portugués en Tacuarembó.<sup>6286</sup> Tanto Ramírez como López eran caudillos

de un inmenso poder carismático, que como en los mitos de la antigüedad se identificaban íntimamente con el campesinado, pues ambos carecían de progenitor conocido.<sup>6287</sup>

En el articulado del Tratado, Buenos Aires se obligaba a defender a los otros dos firmantes en caso de ataque portugués, pero no se comprometía a declarar la guerra a Portugal, cuya provincia Cisplatina (Banda Oriental) contaba con fuerte presencia masónica.<sup>6288</sup> Para el liderazgo porteño, Buenos Aires y las Provincias Unidas no se hallaban en ese entonces en condiciones de declarar la guerra a Portugal, y todo intento de hacerlo habría sido prematuro. Tampoco el gobernador de Entre Ríos Ramírez hizo alusión a su relación subalterna respecto de Artigas. Al equiparar a Buenos Aires con las otras dos provincias en un plano de igualdad que preanunciaba un orden federativo, el Tratado de Pilar fue recibido por la elite porteña como un bochorno y desató el reemplazo del gobernador Sarratea por un miembro del grupo directorial desplazado (Juan Ramón Balcarce).<sup>6289</sup> López y Ramírez junto con el jefe de milicias Estanislao Soler y el propio Carlos María de Alvear impusieron a la Junta de Representantes de Buenos Aires la restitución de Sarratea, quien nuevamente en su cargo ordenó el enjuiciamiento de los miembros del Directorio y del Congreso y el auxilio militar a Ramírez con el objeto de que retirara su contingente armado (*symmakhía*) de la provincia.<sup>6290</sup> Es en esta oportunidad, a partir del 25 de marzo de 1820, que Alvear intenta durante toda una semana una frustrada asonada para alcanzar el poder, que incluyó el asalto a la Sala de Armas.<sup>6291</sup> Luego, la Junta de Representantes, que había reemplazado al Cabildo, elegida con los votos de la ciudad y la campaña, le solicitó la renuncia a Sarratea, porque su cargo era provincial, nombrando en su reemplazo gobernador a Ildefonso Ramos Mejía.<sup>6292</sup>

Simultáneamente Soler, apoyado por sus fuerzas se hizo proclamar por el Cabildo de Luján el 20 de junio como Gobernador y Comandante de Armas, siendo reconocido recién tres días más tarde, ante el cabildo porteño.<sup>6293</sup> Ramos Mejía, el mismo día 20, había presentado su renuncia y para evitar equívocos con una eventual dualidad de poder dispuso que los símbolos de mando fuesen depositados en el Cabildo de Buenos Aires, por su carácter de Cabildo Gobernador. El 20 de junio de 1820, llamado "Día de los tres gobernadores", fue la culminación de un prolongado vacío de poder, pues la provincia de Buenos Aires fue entonces nuevamente invadida por López, apoyado por Alvear y por el chileno José Miguel Carrera (ambos amigos y camaradas de armas desde las guerras napoleónicas), quienes acamparon en San Antonio de Areco.<sup>6294</sup> Al ser derrotado el gobernador Soler en Cañada de la Cruz, donde no se destacó por su valentía, presentó su renuncia el 28 de junio y se exiló en Colonia del Sacramento.<sup>6295</sup>

Es entonces que López promovió, con la prescindencia de Ramírez (quien especulaba con la colaboración de auxilios militares por parte de Sarratea), el nombramiento de Alvear reuniendo una junta electoral en el Cabildo de Luján, que al no ser un Cabildo gobernador constituía por acción militar una alteración de la estructura institucional del estado.<sup>6296</sup> En Buenos Aires su Cabildo desconoció a Alvear, nombrándose como Gobernador Interino a Dorrego, quien acababa de volver de su exilio en los Estados Unidos.<sup>6297</sup> En esa oportunidad, dicho Cabildo envió a Estanislao López un tratado de paz secreto.<sup>6298</sup> En agosto, luego de sofocar la sublevación del Coronel Pagola, quién llegó a la ciudad con los efectivos salvados en Cañada de la Cruz, Dorrego venció en San Nicolás a las fuerzas de López y sus aliados (Alvear y

Carrera), contando con el apoyo de Juan M. de Rosas y de Martín Rodríguez.<sup>6299</sup> Confiado por el triunfo invadió la provincia de Santa Fe, pero fue derrotado en la batalla de Gamonal el 2 de septiembre de 1820.<sup>6300</sup> Luego de la derrota de Dorrego, la legislatura decidió nombrar gobernador el 26 de septiembre a Martín Rodríguez, partidario del acuerdo con López, y esto originó el sangriento tumulto del 1 de octubre de 1820, protagonizado por el segundo tercio de los cívicos y liderado por el oriental coronel Pagola, que fue exitosamente reprimido por Dorrego.<sup>6301</sup>

## **G-II Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la dominación caudillesca (noviembre de 1820)**

Nueve meses más tarde, para lograr restablecer la paz y seguridad en la campaña, el nuevo gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y el gobernador de Santa Fe Estanislao López aceptaron restablecer las negociaciones diplomáticas, para lo cual López tuvo que declinar la alianza que había establecido con Alvear y con el caudillo chileno Carrera.<sup>6302</sup> Ambas provincias se comprometieron a reunirse en un Congreso constituyente en la provincia de Córdoba.<sup>6303</sup> Las exigencias de un nuevo equilibrio de poder que incorporara aquellos estados de naturaleza telurocrática y de symmakhía implicó para Buenos Aires un costo de transición consistente en una compensación económica (indemnización de 25.000 cabezas de ganado) por los gastos que Santa Fe había incurrido en la guerra –rechazada por Martín Rodríguez– y donde Rosas actuó de garantía. Superadas las dificultades, y luego de las conversaciones en la estancia de Insaurralde, el tratado fue firmado en la estancia de Benegas el 24 de noviembre de 1820.<sup>6304</sup> Pero este tratado provocó la inquina de quienes, como Pancho Ramírez, no habían participado del mismo.<sup>6305</sup>

## **G-III Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña (I-1822)**

Derrotado Artigas por los portugueses en Tacuarembó (enero de 1820), y desertado del artiguismo Fructuoso Rivera, se provocó en el seno de las fuerzas anti-porteñas (Santa Fe y Entre Ríos) un duro enfrentamiento por la presencia del primero en tierras entrerrianas.<sup>6306</sup> Esta nueva amenaza a la hegemonía porteña hizo que Sarratea cambiara de parecer respecto a Ramírez y se convenciera de la necesidad de facilitarle el retorno a su tierra con los pertrechos bélicos prometidos en las cláusulas secretas del Tratado de Pilar.<sup>6307</sup>

Merced a la deserción de los caudillos Gervasio Correa y Eusebio Hereñú, representativos de la margen sud-oriental de Entre Ríos, estrechamente conectada con Buenos Aires por vía fluvial, y a dicha contribución militar materializada en la escuadrilla del Comandante italiano Manuel Monteverde, Ramírez pudo finalmente retirar su contingente (symmakhía) de la provincia de Buenos Aires retornando a Entre Ríos y derrotar a Artigas en diferentes y sucesivos combates (Las Guachas, VI-1820; Arroyo de las Tunas, Sauce Luna, Yuquerí, Mocoretá, y Ábalos, VII-1820).<sup>6308</sup> Estas derrotas le impidieron a Artigas, quien contaba con una flotilla de río y expedía patentes de corso desde Goya, hacer realidad su proyecto de cruzar el Paraná para refugiarse en las tolдерías indígenas del Chaco y provocaron su definitivo retiro de la escena política y su ostracismo en Paraguay, hasta su muerte ocurrida treinta años después.<sup>6309</sup> A partir de entonces Ramírez planeó expandir su hegemonía a toda la Mesopotamia como autotitulado Supremo de la República de Entre Ríos. Pero el Pacto de Benegas, firmado

entre Santa Fe y Buenos Aires, al excluir al Gobernador de Entre Ríos le restaba legitimidad.

Esta exclusión legal de la denominada República de Entre Ríos (que incluía a Misiones y Corrientes), sumada a su congénita fragmentación entre la banda del río Paraná, con cabecera en la Villa de La Bajada o Paraná, proclive a alianzas con Santa Fe; y la banda del río Uruguay, con cabecera en la Villa de Concepción del Uruguay, propensa a celebrar contactos fluviales con Buenos Aires, hizo que padeciera de una fuerte endebles institucional. El caudillo entrerriano Ramírez pretendía dirigir la guerra contra los portugueses y al solicitar apoyo a López, para invadir Buenos Aires, éste se lo negó. Es entonces que, en enero de 1821, Ramírez decidió provisto de una escuadrilla propia al mando de Monteverde invadir Santa Fe. Pero Buenos Aires dominaba el río pues contaba con una escuadrilla superior al mando de José Matías Zapiola y un ejército al mando de Gregorio Aráoz de Lamadrid.<sup>6310</sup> De modo tal que, al cruzar Ramírez dicho río se encontró en las Lomas de Coronda en mayo de 1821 entre dos fuegos –el de Lamadrid y el de López-- que no pudo rebasar, de resultas de lo cual, al no conseguir volver a cruzar el Paraná, debió retirarse hacia el Río Tercero o Desmochados (Córdoba). Desde ahí, el 7 de junio de 1821, Ramírez confluyó con Carrera, que venía retrocediendo de Cuyo, y juntos atacaron inútilmente al Gobernador Juan Bautista Bustos en Cruz Alta, para luego dividirse.<sup>6311</sup> Una vez separados por diferencias estratégicas y de personalidad, en julio de 1821, al pretender Ramírez dominar nuevamente a las fuerzas de Bustos fue muerto en Córdoba conjuntamente con su amante portuguesa.<sup>6312</sup> Un destino semejante le tocó a Carrera, quien al intentar retomar la ruta hacia Cuyo para derrocar a Bernardo O'Higgins fue fusilado en Mendoza dos meses después, en septiembre de 1821, por supuesta orden de San Martín. Y otros siete años más tarde, Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo ordenando fusilar a Dorrego.

Muertos ambos, Carrera y Ramírez, y amortiguada la presión telurocrática sobre Buenos Aires, se disolvió la República de Entre Ríos, y las jurisdicciones subalternas de Corrientes y Misiones reasumieron sus respectivas soberanías.<sup>6313</sup> En cuanto al Congreso, que según el Pacto firmado en Benegas debía reunirse en Córdoba, culminó en un total fracaso debido al retiro de la diputación porteña. Un Congreso Nacional sin la presencia del estado que hegemonizaba el orden talasocrático no tenía sentido. En Entre Ríos, a Ramírez le sucedió el coronel Ricardo López Jordán, su medio hermano. Pero Buenos Aires y su Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, ya bajo el influjo de una nueva ley electoral destinada a regular el acceso a la Junta de Representantes y con el Cabildo suprimido, logró mediante préstamos del comercio solventar los gastos militares entrerrianos y ejercer un férreo control sobre la navegabilidad de los ríos Paraná y Uruguay por la acción de la escuadrilla al mando de Zapiola.<sup>6314</sup> El control del río se venía efectivizando desde que en julio de 1814 la plaza realista de Montevideo cayó rendida ante el asedio de las tropas terrestres patriotas y las victorias de Guillermo Brown y su marinería irlandesa en la rada del puerto.<sup>6315</sup> Sin embargo, el control de los ríos y de su estuario no suponía la ausencia de la libertad de navegación, pues en el derecho internacional de una época carente de vías férreas ésta estaba jurídicamente garantizada con antecedentes procedentes del derecho romano y medieval.<sup>6316</sup>

De esa forma, mediante una suerte de talasocracia fluvial de cabotaje, más interesada en el control del comercio interior que del territorio, se logró primero proveer de armamento al contingente o *symmakhía* que se hallaba bajo el mando de Pancho

Ramírez; luego desplazar a su heredero López Jordán; y finalmente el 23 de setiembre de 1821 nombrar como Gobernador al ex jefe de la infantería jordanista Coronel Lucio Mansilla, quien trasladó la capital de Entre Ríos desde su viejo asiento en Concepción del Uruguay a la ciudad de Paraná.<sup>6317</sup> Estas estrategias y tácticas escalonadamente sustitutivas sufrieron repetidas interrupciones con cada bloqueo naval (1838-39, 1844-45).<sup>6318</sup> Treinta años después, para romper el sitio naval que la Confederación Argentina (con capital en Paraná), le hacía al independizado Estado de Buenos Aires, la elite porteña hubo de sobornar al Jefe de la Escuadra de dicha Confederación coronel John Halsted Coe.<sup>6319</sup>

Para acordar la unión defensiva frente al peligro portugués, las provincias del Litoral decidieron seis meses antes de producirse el Grito de Ipiranga (7-IX-1822) firmar el Tratado del Cuadrilátero (25-I-1822), que según Gianello (1972) fue la verdadera “misa de Réquiem” para el pretendido Congreso de Córdoba.<sup>6320</sup> En su artículo primero fijaba la unión de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires en defensa del territorio nacional en caso de invasión. El pacto reservado estipulaba para Santa Fe una indemnización (en ganado y dinero) y el reclamo de tierras sobre la banda oriental del Paraná; y para Corrientes las devoluciones por parte de Entre Ríos de los bienes perdidos durante la acción de Ramírez. Buenos Aires consiguió que en el tratado la palabra Federación no se explicitara, dejándose el camino libre para sus proyectos centralistas en un futuro no muy lejano.<sup>6321</sup> Por último, Santa Fe firmó un acuerdo separado con el Cabildo de Montevideo con el fin de comprometerse para librar a la Banda Oriental del “intruso emperador Pedro I”.<sup>6322</sup>

Producida la independencia de Brasil de la dominación portuguesa, en septiembre de 1822, gran parte de los objetivos del Tratado quedaron debilitados, pues no quedaba clara la legitimidad del Congreso Cisplatino celebrado en 1821 ni la vocación anexionista del nuevo emperador.<sup>6323</sup> Desde el cabildo de Montevideo se declaró que ya no existía el reino al cual se había anexo la Banda Oriental, por lo cual se debería celebrar un nuevo Congreso. Un año más tarde, en octubre de 1823, el Cabildo de Montevideo declaró la nulidad de la anexión, preparando así el camino para la epopeya de los 33 Orientales y la consiguiente guerra contra el Imperio del Brasil.

#### **G-IV Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo**

Nueve años más tarde, habiendo quedado maltrecho el equilibrio de poder por el fracaso del Congreso Constituyente de 1826, se firmó un nuevo tratado conocido como Pacto Federal. Este pacto fue suscripto en la ciudad de Santa Fe el 4 de enero de 1831 por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, por el cual se constituía una alianza ofensiva y defensiva entre los estados federales para hacer frente a la recientemente formada coalición unitaria denominada Liga Unitaria, conformada por todas las provincias del interior, con cabecera en Córdoba, y bajo el liderazgo del General José María Paz. Posteriormente se adhirió al Pacto Federal Corrientes, incorporando su diputado en agosto de 1831. Y más tarde se fueron plegando los demás estados del norte y de Cuyo.

La redacción de un proyecto de tratado se decidió confiar a Juan Manuel de Rosas y al correntino Pedro Ferré. El diputado Ferré, quien había sido criado en una carpintería de rivera y era bien conciente del poder talasocrático de Buenos Aires, y la

necesidad de incorporarse como puerto de cabotaje a dicho poder, planteó tres puntos: a) que debía permanecer la representación de las provincias ligadas, hasta tanto se organizase la nación, con atribuciones determinadas; que esa misma representación debía hacer lo imposible para conseguir la organización general del país; y que la misma representación arreglase el comercio extranjero y la navegación de los ríos.

Representando a Buenos Aires, José María Roxas y Patrón se opuso a las ideas de Ferré, alegando no poseer las facultades para tratar esas críticas cuestiones, por lo que el 24 de julio el diputado por Buenos Aires presentó su propio proyecto de tratado. En un memorandum explicativo reconocía la condición feudataria de las provincias con respecto a la aduana de Buenos Aires. Pero alegaba que en su lugar Buenos Aires afrontaba todos los gastos de transacción que hacían posible ese flujo de mercancías hacia y desde el puerto de Buenos Aires, pues debía atender el servicio de la deuda externa, responder a los reclamos internacionales por los daños inferidos por corsarios con patente otorgada por las Provincias Unidas, velar por la seguridad de las costas marítimas y la vigilancia del estuario, y mantener el servicio exterior mediante diplomáticos con residencia en países extranjeros. Consciente de las privilegiadas condiciones geopolíticas y monopólicas con que contaba Buenos Aires, y ansiando una profunda reforma, Ferré le contestó a Roxas y Patrón con otro memorándum donde criticaba la libre importación de productos que el país producía, y la exclusividad del puerto de Buenos Aires; y proponía en su lugar la diversificación de la capacidad portuaria del país habilitando otros puertos como el de Santa Fe, la nacionalización de la aduana para que sus ingresos se derramaran entre todas las provincias, y la prohibición de la importación de ciertos productos que se manufacturaban en el interior del estado.

En su proyecto Ferré proponía que la comisión de diputados de todas las provincias tuviera a su cargo las tareas de hacer la paz y declarar la guerra, organizar los ejércitos, decidir la utilización de los fondos para sostener a éstos e invitar a todas las provincias a un congreso general que las organizara y declarara una constitución. Hasta que llegara ese momento, la comisión atendería el comercio exterior, regularía la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y promovería el desarrollo industrial. Roxas y Patrón permaneció inflexible y Ferré optó por retirarse de las negociaciones.

La firma del Pacto Federal establecía el cumplimiento de diversos mandatos entre los cuales primaban: a) resistir cualquier invasión extranjera al territorio de alguna de las provincias contratantes, o de cualquiera de las otras que componían el Estado Argentino; b) constituir una alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión por parte de las demás provincias de la república, que amenazara la integridad e independencia de sus territorios; c) evitar celebrar tratados particulares sin previa aceptación de las demás provincias; d) podrían asociarse a la Liga Federal todas las provincias bajo las mismas condiciones que las primeras y con previa aceptación de éstas; y e) en caso de ser atacada una de las firmantes, sería socorrida por las otras cuyas fuerzas estarían bajo el gobierno local.

## **Notas**

## **Capítulo III-C-8**

## **Pactos implícitos para garantizar la organización del estado-nación (1852-1862)**

El ciclo o transición histórica en que este período (1852-1862) está inscripto nació por fractura o colapso, en el episodio de la caída de Rosas (1852) y en la promulgación de la Constitución de 1853. En realidad, la fase histórica que se inició con Caseros (1852) y el Acuerdo de San Nicolás (1852) --la primera dentro de la llamada Organización Nacional (cuarta ola progresiva, 1852-1880)--<sup>6324</sup> fue una transición desde una etapa marcada por la hegemonía de una coalición Confederal de signo Urquicista a otro período sellado por la supremacía de una coalición Liberal de signo Mitrista.<sup>6325</sup> El Acuerdo de San Nicolás, a diferencia del Pacto Federal de 1831, fue eficiente, aunque con coacción, pues configuró una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre engendrada por la actitud de los gobiernos provinciales, heredados del régimen Rosista, y para afianzar la nueva institucionalidad constitucional (representativa, republicana y federal). Sin embargo, su eficiencia no alcanzó para retener en la Confederación al Estado de Buenos Aires, que tras el Pronunciamiento del 11 de septiembre de 1852, se emancipó de la Confederación, provocando con ello una situación de secesión que se perpetuó durante una década, hasta tanto se produjo la batalla de Pavón y el pacto implícito resultante (1862). Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, los recursos con que contaron, las reglas de resolución de conflictos, el equilibrio en la balanza del poder, las innovaciones científico-tecnológicas, las reformas institucionales, las opciones que enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los actores.<sup>6326</sup>

Diez años más tarde, pese a la supuesta derrota militar, con Pavón (1862) se dio un pacto implícito entre Mitre y Urquiza (1862) que logró afianzar la institucionalidad del país. A diferencia del Acuerdo de San Nicolás (1852), que provocó la secesión del Estado de Buenos Aires, el pacto implícito entre Mitre y Urquiza resultó eficiente, aunque con coacción (Pavón), pues configuró una situación de cooperación real que fue funcional para controlar la incertidumbre que significaba la conducta del Urquicismo, atenuar los resabios pre-modernos aún subsistentes y afianzar la institucionalidad. Al unificarse el país, se lograron una serie numerosa de innovaciones modernas: a) una Justicia Federal, que entró a supervisar los procesos electorales y los movimientos sediciosos;<sup>6327</sup> b) un Ejército Nacional que monopolizó el ejercicio de la violencia reemplazando a los ejércitos o milicias provinciales;<sup>6328</sup> c) una Corte Suprema de Justicia que entró a dirimir los nuevos conflictos de poder;<sup>6329</sup> d) una frustrada unidad monetaria de valor constante (peso fuerte);<sup>6330</sup> e) una deuda externa consolidada;<sup>6331</sup> f) una prensa que tras un duro batallar alcanzó a ejercer la libre expresión de sus ideas;<sup>6332</sup> g) una red de colegios nacionales en todo el país;<sup>6333</sup> h) una integración con las colectividades extranjeras, especialmente la Italiana;<sup>6334</sup> e i) un avance del estado sobre los vínculos capellánicos y las tradicionales funciones registrativo-simbólicas de la Iglesia Católica.<sup>6335</sup>

La transformación del ejército desde una estructura provincial, romántica y guerrera a una estructura nacional, profesional y centralizada comenzó, a partir de Pavón, con la nacionalización del Ministerio de Guerra y Marina de la Provincia de Buenos Aires; y a juicio de Cantón (1965), con la fundación del Colegio Militar en tiempos de Sarmiento.<sup>6336</sup> La Corte Suprema de entonces (1865) reconoció en un célebre fallo la validez de las resoluciones dictadas por el Gral. Mitre en el breve período transcurrido entre el derrocamiento del Presidente Santiago Derqui, con motivo de la batalla de Pavón, y la reunión del Colegio o Junta Electoral que legitimó su investidura presidencial de facto,

"...por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía".<sup>6337</sup>

Pero acaso ¿podemos afirmar que luego de Pavón el Liberalismo Mitrista se constituyó en un partido político fuerte, y que logró consolidarse, aglutinando y configurando una voluntad colectiva en un partido revolucionario de alcance nacional; conformando un nuevo orden intelectual y moral; y convirtiendo su filosofía liberal en cosmovisión de masas y sus intereses en universales?. Creo que la respuesta debe ser doble. Por un lado, es indudable que el Liberalismo Mitrista estuvo en fuerza para subordinar la multitud de facciones políticas existentes en el interior del país; pero por otro lado, estuvo lejos de lograr su consolidación política, al tener que acudir a métodos de control autoritarios o coercitivos (caso Taboada) y extra-partidarios; y tener que acudir a prácticas subversivas (La Verde). Precisamente, por no lograr esta conversión comenzó su irremediable caída.

Aparentemente, a juicio de Abercrombie (1984), las ideologías dominantes eran más efectivas para cohesionar las elites que para persuadir a las masas.<sup>6338</sup> Como las revoluciones desde arriba, o en términos Gramscianos, las revoluciones pasivas,<sup>6339</sup> se intentaron lograr sin movilizar a las masas, sin absorber las ganancias de las clases propietarias, y sin distribuir la tierra pública ni redistribuir los predios privados, los excedentes sólo podían ser extraídos, según autores pertenecientes a la escuela del Nuevo Institucionalismo (Skocpol, 1979, 1984; y Trimberger, 1978), con la cooperación de las mismas clases propietarias locales, para lo cual se requería como condición sine qua non la unidad de las mismas.<sup>6340</sup>

Los testimonios escritos revelan un permanente rechazo crítico de parte de los actores políticos de entonces a los gobiernos tiránicos provinciales. El Senador Nacional Ángel Aurelio Navarro,<sup>6341</sup> declaró en la sesión del Senado donde se debatió la intervención a Catamarca, acontecida en 1866, que:

"...si un gobernador arbitrario, audaz, tiránico, se perpetúa en el gobierno o quiere sostenerse más allá de lo que la Constitución le permite, si oprime a los ciudadanos y los aprisiona o los destierra, valiéndose de un círculo de aventureros para sofocar todas las libertades y perpetuarse más y más en el poder, hasta que al fin el pueblo llegase a armarse para derrocar a ese tirano, ¿habría de ir el gobierno nacional a reponer a ese tirano?".<sup>6342</sup>

De ninguna manera, contestaba Navarro, ese gobernador

"...podría reponerse; sería autorizar la revolución, sería autorizar el despotismo, la arbitrariedad, sería autorizar la violencia y el fraude con que un hombre se apodera del poder público para perpetuarse en él; eso sí que sería entronizar la tiranía y la arbitrariedad, que es lo que se ha querido evitar al sancionar la Constitución y las leyes".<sup>6343</sup>

Acerca del origen de estos gobiernos provinciales violatorios de las Constituciones, el Diputado Nacional por Tucumán Delfín Gallo,<sup>6344</sup> llegó a afirmar que los actores políticos y sociales gestores de dichas violaciones podían llegar a proceder tanto del pueblo como de sus gobernantes.<sup>6345</sup> Pero a juicio de Gallo,

"...es más frecuente que partan de los mismos gobernantes; son mas bien ellos, los que tienen tendencias a apoderarse de las libertades públicas, y no los pueblos los que tienden a arrebatarse a los gobiernos, sus facultades; y si un hecho semejante se produjese, si un pueblo viniese a encontrarse despojado de sus libertades, si viniese a encontrarse en la imposibilidad de hacer jugar todo su mecanismo institucional, diré así, a consecuencias de violencias producidas por sus gobernantes ¿que recurso le quedaría? ¿La revolución? No, Sr. Presidente".<sup>6346</sup>

Los antecedentes históricos de donde se partía en ese entonces para analizar el federalismo, es decir, la autonomía de los estados provinciales, necesariamente incidía en las conclusiones arribadas.<sup>6347</sup> El miembro informante de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dr. Luis Lagos García,<sup>6348</sup> en el frustrado debate sobre la intervención a la provincia de Salta (1877),<sup>6349</sup> al practicar la misma lectura que habían ejercitado los Comentaristas Norteamericanos,<sup>6350</sup> que sostenían la intangibilidad, supremacía u omnipotencia de las Legislaturas de los estados de la Unión por sobre el gobierno federal, partía al decir del Diputado Nacional de filiación mitrista Pedro Uriburu,<sup>6351</sup> de antecedentes históricos propios de los Estados Unidos que "...no eran los nuestros".<sup>6352</sup> Pero a diferencia de los Estados Unidos, donde las trece colonias originarias tenían fuertemente arraigadas virtudes propias de la moral puritana y costumbres de gobierno propio,<sup>6353</sup> el Diputado Uriburu, partidario de la intervención, refutó a Lagos García, destacando que en nuestro país "...los pueblos argentinos se han debatido entre los furores de la anarquía o entre las cadenas del despotismo [el colonialismo Español y el Rosismo]".<sup>6354</sup> Para paliar ese tremendo déficit, nuestros constituyentes, inspirados en los escritos de Echeverría, Alberdi y Florencio Varela,

"....dictaron leyes que garantiesen [sic] a los Poderes Públicos contra los embates de la sedición, [pero] también dictaron medidas tendentes a garantizar al pueblo contra las usurpaciones de los gobernantes; y a este doble objeto responden las disposiciones contenidas en los artículos 5o. y 6o. de nuestra Constitución Nacional".<sup>6355</sup>

### **Capítulo III-C-9 Interregno de paz forzada entre fracciones dominantes (1877-80).**

#### **Índice**

- I-I Frustrado intento de transición política pacífica.
- I-II Conciliación en Corrientes y su fracaso
- I-III Conciliación en Jujuy acechada por la tropa de Línea
- I-IV Revolución de los Conspicuos en Jujuy.
- I-V Conciliación en Salta sujeta a la opinión parlamentaria nacional
- I-VI Conciliación en Tucumán emboscada por una Legislatura que operaba como Colegio Electoral
- I-VII Conciliación en Santiago del Estero garantizada por el matriarcado
- I-VIII Conciliación en Córdoba desafiada por el periodismo

#### **I-I Frustrado intento de transición política pacífica.**

A diferencia de los períodos de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos Aires (1852-62), cuando lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, Cuadrilátero, San Nicolás), en la Conciliación con el Mitrismo ya se había producido la Organización Nacional y la dominación ya no era de orden carismático pero sí legal-constitucional. Como en todo proceso de transición lo que cambió fue la naturaleza de los actores, los recursos con que se contaba, las reglas de resolución de conflictos, las opciones que se enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los actores.<sup>6356</sup> Esta etapa se caracterizó en el plano de lo económico y social por una expansión de la red comunicacional (ferroviaria) y un incremento notorio de la inmigración Europea.<sup>6357</sup>

Luego de casi treinta años de sorda y crónica guerra civil entre Autonomistas y Liberal-Nacionalistas (Mitristas) causada por las sucesivas violaciones a las Constituciones Nacional y Provinciales, la Conciliación propuesta en 1878 por el Presidente Avellaneda como programa de paz, se inició con la amnistía a todos aquellos que participaron cuatro años antes (1874) en las insurrecciones de La Verde y Santa Rosa.<sup>6358</sup> Este programa intentó ser algo mas que una mera tregua o armisticio, pues buscaba acabar con la incertidumbre provocada por la marginación política del Mitrismo, para reincorporarlo al ruedo político.<sup>6359</sup> En realidad, la denominada Conciliación fue un intento frustrado de transición política pacífica, que se manifestó en la última etapa de la Organización Nacional, desde el fin de la ola marcada por la hegemonía Liberal-Mitrista (1874) hasta la contraola regresiva signada por la supremacía del Autonomismo Roquista (1880).<sup>6360</sup>

A partir de la política de Conciliación tuvo lugar una creciente fragmentación política alentada tanto por el rechazo que la misma significaba para algunos sectores como por los incentivos selectivos que la nueva etapa que se vivía prometían. Con dicha política y con la muerte de Alsina en 1877, el partido Autonomista sufrió un primer desprendimiento: el Partido Republicano, opuesto a la Conciliación. A su vez, en vísperas de la sucesión presidencial, el Partido Republicano también se fragmentó en tres facciones que perseguían, al decir de Buchanan y Tullock (1962), maximizar sus respectivas posiciones:

- 1) el grupo encabezado por Dardo Rocha, que cerró filas con la candidatura de Roca;
- 2) los que con Aristóbulo del Valle, se habían opuesto a la Conciliación propuesta por Avellaneda y apoyaron la candidatura del Ministro del Interior y ex-Presidente Sarmiento;
- y 3) los que con Leandro Alem también se habían opuesto a la Conciliación y sostuvieron la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen.<sup>6361</sup>

Si bien la conciliación que el partido Mitrista pretendía, era para el Gral. Julio A. Roca una bandera política, para el Diputado Nacional y Ministro de Justicia e Instrucción Pública Onésimo Leguizamón,<sup>6362</sup> de antecedentes Urquicistas pero de filiación Nacional Avellanedista, era "...el predominio para sí [del Mitrismo], y la derrota para el partido gobernante [Autonomista]".<sup>6363</sup> Fracasada la política de la Conciliación, por las insurrecciones de signo Liberal-Mitrista acontecidas en Jujuy y en Corrientes, el Río de la Plata volvió a experimentar entre 1878 y 1880 una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, cuyos ecos conflictivos llegaron al gabinete, al parlamento, a la Corte Suprema de Justicia, a la Iglesia, al Ejército, al periodismo, a los

Bancos y Colegios nacionales, a los Juzgados de Paz,<sup>6364</sup> a las Jefaturas Políticas, y por cierto a los propios partidos políticos.<sup>6365</sup>

En Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía política la disputaban el Autonomismo Avellaneda y el Mitrisismo, en Marzo de 1877 se sufrió una aguda crisis con motivo del frustrado estallido revolucionario contra el Gobernador Servando Bayo,<sup>6366</sup> destinado a impedir la reelección de Simón de Iriondo,<sup>6367</sup> y que fuera liderado por el malogrado ex-Gobernador liberal Patricio Cullen, derrotado en la batalla del Paso de los Cachos.<sup>6368</sup> Un año más tarde, en 1878, reelegido Simón de Iriondo, fuerzas liberal-Mitristas encabezadas por Ignacio Crespo,<sup>6369</sup> se sublevaron pero fueron derrotadas.<sup>6370</sup> Y también, se hizo ver en Cuyo, en especial en San Juan, donde en mayo de 1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación Avellaneda, el situacionismo u oficialismo, cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los Regeneradores, se dividió entre aquellos partidarios de la misma y los opuestos a ella.

## **I-II Conciliación en Corrientes y su fracaso**

Pero el verdadero centro de todas las rivalidades litoraleñas era en ese entonces Corrientes, donde se disputaban el poder local el Autonomismo y el Liberalismo Mitrista. Habiéndose desajustado o desequilibrado la balanza del poder político con la muerte del Gobernador Juan Vicente Pampín,<sup>6371</sup> y la defección del Vice-Gobernador José Luis Madariaga de las filas del llamado Fusionismo,<sup>6372</sup> llamóse nuevamente a elecciones donde el candidato era Manuel Derqui.<sup>6373</sup> Si bien el Gobernador Madariaga no era el padre de Derqui, era tío lejano de su mujer y, en opinión del Canciller Manuel Augusto Montes de Oca, Derqui era

"...hijo de la voluntad y de las obras políticas del señor Madariaga, que le había preparado el camino, y quiso, al retirarse, no abandonar el puesto de Gobernador, sino dejarlo a un hombre que significase lo mismo que él".<sup>6374</sup>

Triunfantes los Autonomistas --bajo el liderazgo de Manuel Derqui y el apoyo de Madariaga-- por sobre el liberal Felipe Cabral,<sup>6375</sup> mediante el fraude, los liberales Mitristas se levantaron en armas.<sup>6376</sup>

Esta primera insurrección, que tuvo un gran alcance popular y se extendió por toda la provincia, obedeció al fraude que significaba integrar el Colegio Electoral con legisladores y empleados de la administración provincial (violando las incompatibilidades establecidas en la Constitución de Corrientes),<sup>6377</sup> y se asemejó en su efecto de shock o sustitución de fracturas --aunque estuvo en las antípodas ideológicas-- con la experimentada por Entre Ríos ocho años atrás (durante las sucesivas rebeliones de López Jordán). Dicha insurrección convenció a Derqui acerca de la necesidad de solicitar la intervención federal, y al Congreso Nacional a decretarla, la cual fue confiada a Victorino de la Plaza, partidario de la Conciliación.<sup>6378</sup> Esta Intervención que según los Autonomistas se debía reducir a la reposición de Derqui, fue cuestionada por los Liberales, para quienes se debía convocar nuevamente a elecciones.<sup>6379</sup> La orden de reponer a las autoridades de campaña desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo ver al Juez Federal José Benjamín Romero,<sup>6380</sup> en carta al dirigente del Partido Republicano Dardo Rocha, que donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz,<sup>6381</sup> el Interventor De la Plaza se ha atribuido "...la facultad de crearlos".<sup>6382</sup> También cuidó el Interventor en Corrientes de

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".<sup>6383</sup>

Entre los Comandantes que no fueron repuestos por el Gobierno nacional figuraban muchos que aún se hallaban exilados en Entre Ríos y el Uruguay. Los Coroneles de Milicias Reyna, Araujo, Martínez,<sup>6384</sup> Romero,<sup>6385</sup> y Eustaquio Acuña,<sup>6386</sup> que respondían al afamado dirigente liberal Coronel Santiago Baibiene,<sup>6387</sup> eran

"...enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen contingente si V. logra atraparlo, pues a la par de estos irá una infinidad de jefes de menos graduación y oficiales que mucho valen".<sup>6388</sup>

Al fracasar la Conciliación, el partido Liberal de Corrientes reclamó la solidaridad de sus correligionarios en el gabinete nacional, Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez, quienes el 24 de abril de 1878 se vieron precisados a presentar sus respectivas renunciaciones, designándose en su lugar a otros liberales Mitristas: Saturnino Laspiur como Ministro del Interior, Bonifacio Lastra como Ministro de Instrucción Pública, y Manuel A. Montes de Oca como Ministro de Relaciones Exteriores, y por muerte de Alsina al Autonomista Julio A. Roca como Ministro de Guerra.<sup>6389</sup> Pero el licenciamiento de las tropas nacionales, por orden del Gral. José Inocencio Arias,<sup>6390</sup> azoró a los Autonomistas Correntinos y alentó a los liberales a una nueva revuelta, dirimiéndose el conflicto militarmente en la llamada batalla de Ifrán.<sup>6391</sup> En dicha batalla resultaron vencedores los Coroneles Mitristas Marcos Azcona, Plácido Martínez y Raymundo Reguera.<sup>6392</sup> La derrota militar y política del Autonomismo Correntino obedeció al error de los Ministros Desiderio Rosas,<sup>6393</sup> y Severo Fernández de ocuparse tan sólo de planes electorales y del saqueo de tierras,<sup>6394</sup> subestimando la organización del Ejército, así como a la impericia militar del Coronel Luciano Cáceres al ofrecer batalla a los insurrectos.<sup>6395</sup> Dicha derrota convenció a Derqui de abandonar el gobierno, permitiendo a Felipe Cabral ser elegido nuevamente Gobernador, apoyado esta vez por el Ministro del Interior Saturnino Laspiur.<sup>6396</sup>

La crisis o fractura política experimentada en Corrientes revelaba la endeblez de la política de la Conciliación y delataba su fracaso.<sup>6397</sup> El conflicto correntino se iba a definir transitoriamente a favor los Autonomistas recién una vez que el principal pleito armado (el que se debatía sobre la cuestión Capital entre Roca y Tejedor), se resolvió a favor de Roca y la federalización de Buenos Aires.<sup>6398</sup> A diferencia de Corrientes, que era el epicentro de todas las disputas, el extremo sur de la mesopotamia argentina, la provincia de Entre Ríos, venía de una cruenta rebelión popular, iniciada en 1870, que tras su derrota había vuelto impopular toda reivindicación política formulada mediante la violencia.<sup>6399</sup>

### **I-III Conciliación en Jujuy acechada por la tropa de Línea**

En las provincias correspondientes al subconjunto político del Norte, a mediados de 1877, las violaciones a la Constitución por parte de los gobernantes, provocadas por el afán de manipular la cuestión presidencial o sucesoria futura, tenían en vilo a todas las facciones políticas. En Jujuy, como la acechanza del Regimiento XII de Línea, dirigido por Napoleón Uriburu --partidario de la facción Barcenista opuesta al Gobernador Cástulo Aparicio-- alimentaba la incertidumbre en las provincias del Norte, los gobernadores de Salta y Jujuy, Moisés Oliva y Cástulo Aparicio, se pusieron de acuerdo en abril de 1878

para sacar en Jujuy como candidato de transacción --entre la facción Conspícua, de pasado Mitrista, y la facción Barcenista, de pasado Autonomista-- a Martín Torino.<sup>6400</sup> Pero frente a la alianza de los Conspícuos, los Barcenistas y el Comandante Napoleón Uriburu, el Gobernador Torino y sus Ministros José María Orihuela y Domingo T. Pérez, apenas podían sostenerse pues, en las gráficas palabra del tucumano Benjamín Posse, sólo eran "...aquellos valores nominales que los comerciantes quebrados suelen hacer figurar en sus libros llevando todo el pasivo del balance".<sup>6401</sup> Más como el partido Conspícuo, dirigido por Fenelón de la Quintana y Echavarría,<sup>6402</sup> se alió públicamente con el Barcenismo --en la persona de José Benito de la Bárcena,<sup>6403</sup> cuñado de Uriburu-- hubo quienes pensaban que esta coalición partidaria estaba destinada a boicotear aquel acuerdo entre los gobernadores Aparicio y Oliva, pues "...responde al propósito de apoyar un movimiento revolucionario que debe estallar en Salta para derrocar al Gobernador Moisés Oliva Cornejo".<sup>6404</sup>

#### **I-IV Revolución de los Conspicuos en Jujuy.**

En el transcurso de menos de un año, el 12 de mayo de 1879, y como fruto de esta coalición, estalló en Jujuy la revolución de los Conspicuos que derrocó a Torino. Los Conspicuos, habían estado en el 74 a favor de Mitre, luego ambigua y simultáneamente al servicio del Gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor, aspirante a la presidencia de la República, y también al servicio de la candidatura del efímero Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento,<sup>6405</sup> y finalmente, a comienzos de la década del 80, a favor del Irigoyenismo Bernardista (mazorquero o Derquista). Si bien los revolucionarios o Conspicuos lograron encarcelar a Torino y nombrar Gobernador Interino al Coronel Silvestre Cau,<sup>6406</sup> los Ministros Orihuela y Pérez alcanzaron a escapar, para luego organizar la resistencia en la Quebrada de Humahuaca, merced al apoyo de las comunidades indígenas de la Puna, resultando provisoriamente victoriosos.<sup>6407</sup>

En la tarea de reponer a las autoridades legítimas, Jujuy fue entonces nuevamente intervenida por decreto del Gobierno Nacional, del 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, quien para ese entonces aspiraba nuevamente a la presidencia. Sarmiento se oponía a la política de la Conciliación, pues se había opuesto a la amnistía de los revolucionarios de La Verde, y estaba afiliado al Partido Republicano.<sup>6408</sup> En dicho mensaje se desarrollaba una peculiar teoría que garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial,<sup>6409</sup> la cual fue aplicada luego a otras provincias (vgr.: Tucumán).<sup>6410</sup> La Intervención recayó en el Ministro de la Suprema Corte Uladislao Frías Gramajo, para quien la tarea no fue fácil pues, según José María Astigueta "...ha ido a medias a interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro Escalígero".<sup>6411</sup> Primero Frías les propuso a los Conspicuos como base del arreglo la reposición de Torino, seguida de su inmediata renuncia, para luego nombrar a José María Álvarez Prado, sobrino político de Bárcena.<sup>6412</sup> Pero estas bases no fueron aceptadas. En opinión de Astigueta, Torino volvería a caer apenas fuere repuesto por la Intervención. A las barbas del Interventor Frías, los Conspicuos estaban "...fundiendo balas en gran cantidad preparándose a invadir a Salta en la primer oportunidad".<sup>6413</sup> Finalmente, el 6 de enero de 1880, Frías puso en práctica, según Absalón Rojas,<sup>6414</sup> "...las originales y pérfidias teorías de Sarmiento", continuadora de aquella que sostenía que "las rebeliones podían crear gobiernos", al reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones sólo para sustituir a aquellos cuyo mandato había fenecido.<sup>6415</sup>

Como la "situación" de Jujuy con Torino se hallaba muy vinculada a la "situación" de Salta, donde gobernaba Moisés Oliva,<sup>6416</sup> la actitud conciliatoria de Frías con los Conspicuos perjudicaba al partido Autonomista Nacional, al extremo que Rojas le confesaba al Ministro de Guerra Julio A. Roca, elegido en reemplazo del finado Adolfo Alsina --quien para ese entonces también aspiraba a la Presidencia de la República-- su temor

"...que los hombres que se encuentran al frente de ella se enfríen respecto de su candidatura suponiendo que Vd. pudiéndolo, no evita que el Interventor dé el giro que está dando a aquellos asuntos de Jujuy".<sup>6417</sup>

Rojas no se explicaba la tibia conducta del Presidente Avellaneda "...tendiente a remover situaciones y crear conflictos en lugar de apagarlos en estos momentos tan difíciles y tan delicados".<sup>6418</sup>

Pareciera que los términos de una carta de Rojas fueron los que decidieron a Roca a actuar,<sup>6419</sup> pues un mes después, el 13 de febrero de 1880, Frías renunciaba, así como el Ministro del Interior D. F. Sarmiento, y el Poder Ejecutivo designaba como nuevo Interventor de Jujuy al Dr. Vicente Saravia, quien presidió las elecciones del nuevo Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante.<sup>6420</sup> La revolución de los Conspicuos, partidarios de una nueva candidatura presidencial de Sarmiento, vino a desequilibrar la balanza del poder político de todo el norte de la República, enhebrada a propósito de la sucesión presidencial. El propio Napoleón Uriburu, en una lúcida carta dirigida a Roca, le manifestaba que

"...aunque la jente [Torino] que gobernaba esa Provincia debía caer de su propio peso,...siento [o lamento] que esa revolución haya sido hecha por los Conspicuos, jente que tiene bastante influencia y cuyas ideas son radicales contra nuestros intereses nacionales [candidatura presidencial]".<sup>6421</sup>

Los Mitristas, en cambio, creían ver en la Revolución de los Conspicuos "...una tabla de [la] que pueden agarrarse en el naufragio que ha sufrido su combinación en el norte".<sup>6422</sup> Y el Tucumano José Posse, (a) "Pepe", el hasta entonces gran amigo de Sarmiento, observaba en carta a Roca, que fuera de los rencores de Bárcena y de Bustamante, cooperaron en la revuelta de los Conspicuos

"...los que en Salta llaman Uriburistas, los Tamayo, Ugarriza y Obejeros, que son los que han estado dirigiendo telegramas a Buenos Aires calumniando al Gobierno de Salta [de Moisés Oliva]".<sup>6423</sup>

Pero la crisis Jujeña, pese a la valiosa ayuda política prestada por la nueva tecnología telegráfica, duró tanto como la política de la Conciliación instaurada por Avellaneda, pues ambos Ministros Roca y Sarmiento debieron renunciar, suplantados por Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza. La crisis política se definió a favor de los Barcenistas, meses después que el pleito porteño entre Tejedor y las provincias, se resolviera en términos militares, en beneficio de la federalización de Buenos Aires.<sup>6424</sup>

## **I-V Conciliación en Salta sujeta a la opinión parlamentaria nacional**

En Salta, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuyo predominio político también competían las conducciones nacionales del Autonomismo y del

Liberalismo, el establishment político local se había bifurcado peligrosamente. El Gobernador Benedicto Fresco había apoyado la candidatura del Inspector General de Armas Cnel. Juan Solá, y el Comandante Napoleón Uriburu la del Dr. Andrés Ugarriza, produciéndose una suerte de empate electoral que dio lugar a multas, suspensiones e intimidaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual movió a la oposición a reclamar la intervención federal.<sup>6425</sup> Este pedido de intervención desató en Buenos Aires una intensa división interna que se trasladó del gabinete nacional al parlamento, a la justicia, e incluso al seno de los partidos políticos. En efecto, el Ministro del Interior Simón de Iriondo y el de Instrucción Pública Onésimo Leguizamón se manifestaron a favor de la intervención federal; y el de Guerra, Adolfo Alsina, el de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, y el de Hacienda Victorino de la Plaza, en contra, por sostener que un conflicto de poderes interno a una provincia no era susceptible de ser sometido a la consideración del Congreso sino que debía ser dirimido por el Poder Judicial.<sup>6426</sup> En el Congreso Nacional, mientras el Senado, con el voto de Aristóbulo del Valle y de Sarmiento, se declaraba partidario de la intervención; la Cámara de Diputados se opuso, con el voto y la opinión fundada de Luis Lagos García, Miguel Cané, Guillermo San Román y Carlos Pellegrini; y contra el parecer de Vicente Fidel López, Eduardo Wilde, Pedro Uriburu y Delfín Gallo, favorables a la intervención.<sup>6427</sup> Y en el seno del Autonomismo, la postura de Del Valle --opuesta a la de Alsina-- provocó la fractura de dicho partido dando origen al Partido Republicano.<sup>6428</sup> Desechada la intervención, se realizaron nuevos comicios y resultó Solá triunfador, a quien el Presidente Avellaneda le comunicó que esperaba hiciera un gobierno de conciliación.<sup>6429</sup>

Al salir elegido Solá y derrotado Ugarriza (el candidato del Comandante Napoleón Uriburu), la situación se volcó a favor de la candidatura presidencial Autonomista, partidaria de Alsina, pero al reformarse la Constitución de Salta y entrar a regir el Colegio Electoral, como única fuente en la designación de los futuros Gobernadores, se acentuaron las tensiones del Autonomismo con el Mitrisismo, hasta llegar al borde de la intervención federal.<sup>6430</sup> En la nueva contienda electoral por la Gobernación se perfilaba como ganador al candidato Francisco J. Ortiz.<sup>6431</sup> Fue entonces que la oposición a Ortiz se trató de hacer con la candidatura de Olegario Ojeda.<sup>6432</sup> Pero un inesperado telegrama de Luis del Carril hizo desistir a este último.<sup>6433</sup> El deseo de Ojeda era que en la futura cuestión presidencial, Salta se alineara con Córdoba, San Luis y Mendoza, a favor de Roca, para de esa manera poder "...haber dicho que tenés en tu mano [la de Roca] la solución del problema".<sup>6434</sup> Efectivamente, si Roca hubiera tenido en 1877 el voto de Salta en sus manos, ya sea por haber sido aceptada la candidatura de Ojeda,<sup>6435</sup> o por haber triunfado en la Cámara de Diputados de la Nación la tesis intervencionista, promovida por el Senado, con el apoyo de los Senadores Aristóbulo del Valle y Domingo F. Sarmiento, y haber sido el propio Roca designado Interventor, "...podríamos haber contado en tu poder con la mitad de los votos, pues Salta habría arrastrado a Jujuy y Mendoza a San Juan".<sup>6436</sup> Al año siguiente, en 1878, si los que gobernaban a Salta, decía el ex-Gobernador Delfín Leguizamón,<sup>6437</sup> "...ven que la candidatura Tejedor tiene probabilidades de triunfo arrearán, con uno de los que puedan pasar por autonomistas, como sería [Moisés] Oliva, o algún otro".<sup>6438</sup> Pero si la candidatura de Oliva fracasara, y fueren los Mitristas los favorecidos por la fortuna,

"...ellos seguirán como están y será [Francisco J.] Ortiz quien manejará estos negocios, como lo hace ahora, y lo hará también en caso contrario, aún cuando [Ortiz] no aparezca como principal actor".<sup>6439</sup>

Pero el verdadero factor desequilibrante en Salta lo constituía el clan de los Uriburu, partidarios del Liberalismo Mitrista. Lo peor de esta experiencia política era, para el candidato a Gobernador Olegario Ojeda, amigo y camarada del Coronel Julio A. Roca, que

"...[los Uriburu] nos han embromado al embromarse, pues si Solá sale de Gobernador, la provincia pertenecería a [la candidatura de] Alsina en la próxima lucha electoral, y si sale [Francisco] Ortiz, a Mitre".<sup>6440</sup>

Los Uriburu, "...hubieran podido hacer aceptar por los adversarios [Autonomistas] un candidato que les ofreciera algunas garantías".<sup>6441</sup> Pero el despecho de la derrota "...los hace ir de error en error y no han de acordarse de remediarlo".<sup>6442</sup>

Pero la unidad del frente anti-uriburista no se hallaba garantida, pues en Salta los clanes familiares Autonomistas no se fusionaban, tanto que el clan Ortiz Alemán no se daba con el más numeroso clan de los Figueroa. En carta de Marcos Figueroa, a Victorino de la Plaza, de Agosto de 1879, el primero le manifestaba que

"...más hoy o más mañana tenía que suceder un enfriamiento y tal vez una ruptura en política, puesto que somos elementos eterogéneos [sic] en la política nacional. El [Francisco J. Ortiz] es Mitrista y toda mi familia Roquista, mal podemos conservar solidaridad en ideas cuando somos los polos opuestos".<sup>6443</sup>

Tres meses después, Figueroa le informaba a Plaza que en la elección que la Legislatura debía hacer del Senador Nacional, como cada día que pasaba la facción pro-Plaza iba ganando terreno, los seguidores de Ortiz precipitaron la elección de Juan Martín Leguizamón para antes que arribara el Veedor Dr. Uladislao Frías.<sup>6444</sup> Para peor, habiendo llegado las actas de Orán con el voto de tres Diputados de la familia Figueroa a favor de Victorino de la Plaza,<sup>6445</sup> la Junta Electoral, al influjo de los Ortices, no quiso recibir dichos votos.<sup>6446</sup> El motivo de la derrota de Plaza frente a la candidatura de Leguizamón, se debería según Ortiz a "...que sus trabajos fueron tardíos".<sup>6447</sup> No obstante este primer fracaso, Figueroa no se arredró, y dos meses mas tarde le escribe a Plaza manifestándole su satisfacción porque "...he podido mover a toda mi familia, que como un solo hombre se ha puesto de pie a trabajar por Vd. eliminando compromisos de antemano".<sup>6448</sup> Lo que más le satisfizo fue que su sobrino Abrahám Echazú,<sup>6449</sup>

"...deseoso de complacerme ha renunciado su candidatura para que no se pierda en la Provincia un sólo voto de los que pudieran a Vd. perjudicarlo".<sup>6450</sup>

Por cierto este apoyo no era gratuito, por cuanto al final de la extensa carta Figueroa le recordaba a Plaza "...la recomendación que le hice de las pagas de las mensualidades de la proveeduría [del Regimiento 12 de Línea] de mi hermano Dn. Octavio Figueroa".<sup>6451</sup>

Dueños los Ortices de la situación de Salta, logran finalmente imponer como Gobernador, la candidatura de Miguel S. Ortiz,<sup>6452</sup> la cual "...ni los mismos Uriburus cuyo odio es de raza, le harán oposición".<sup>6453</sup> Para consumir sus propósitos, los Ortices llevaban a la rastra al Gobernador Moisés Oliva, para lo cual les fue preciso poner de Ministro de Gobierno a Miguel Tedín "...siendo fácil hacerlo sin estos recursos pues Oliva es peor que Solá, que es cuanto se puede decir".<sup>6454</sup>

## **I-VI Conciliación en Tucumán emboscada por una Legislatura que operaba como Colegio Electoral**

En Tucumán, también concerniente al subconjunto político del Norte, y cuya hegemonía política se la disputaban las conducciones nacionales del Autonomismo y del Liberalismo, la elite dirigente local se hallaba, en 1878, dividida en cuatro fracciones. La Legislatura se componía de nueve (9) republicanos (Sarmientistas), cinco (5) federales, trece (13) unionistas (autonomistas), y otros trece (13) nacionalistas Mitristas.<sup>6455</sup> El Gobernador Federico Helguera, tenido por "...Tejedorista latente" y a juicio de Pepe Posse "un necio difícil de domesticar",<sup>6456</sup> había renunciado al cargo.

Este vacío en el sillón gubernativo hizo que Republicanos y Federales se unieran, a los que se juntaron los Unionistas, todos los cuales estuvieron bajo el espíritu de la Conciliación Avellaneda por la candidatura de Miguel M. Nougués.<sup>6457</sup> Pero la proclamación de Nougués como gobernador fue madrugada por los Republicanos (Sarmientista), causando esto el enojo de los Unionistas (Autonomista), al extremo de que un grupo de ellos pensaba dar su voto al candidato Mitrista.<sup>6458</sup> A instancias de la Conciliación propugnada por el Presidente Avellaneda, se acordó explícitamente mediante un documento firmado, que mediante "sorteo o ley del azar" los Diputados Nacionales correspondieran al Club Unión (Avellanedistas) y los Diputados Provinciales al Comité Nacionalista (Mitrista).<sup>6459</sup> Más luego, los Electores Agustín de la Vega, Emilio Sal y José M. Astigueta propusieron, con el apoyo de las facciones Unionista (F. Helguera) y Nacionalista Mitrista, la candidatura del Unionista Domingo Martínez Muñecas para Gobernador,<sup>6460</sup> logrando la cantidad de votos necesarios, bajo la condición pactada explícitamente de nombrar un Ministro Nacionalista, dejar el resto de la administración como estaba y que la cuestión presidencial solo podía ser tratada seis meses antes de la elección.<sup>6461</sup> Indudablemente que si el pacto explícito --fruto de la Conciliación-- que trajo a Muñecas como Gobernador "...hubiese de cumplirse tal como los Mitristas lo comprendían, el resultado habría sido la preponderancia de estos".<sup>6462</sup> Pero a instancias de Absalón Rojas y de Nougués, y por incidencia de los sucesos nacionales, el Pacto entre Avellanedistas y Mitristas se rompió, y si bien hasta fines de 1878 no se cumplió nada de lo que en él se había estipulado

"...se hace lo posible para mantener la armonía con los que pactaron, en virtud de la generosidad que ellos tuvieron de devolver ese documento [firmado] y dejar desligado a Martínez Muñecas de esos compromisos".<sup>6463</sup>

Debido a la ruptura del Pacto, los Nacionalistas Mitristas absolvieron a Muñecas del deber de nombrar un Ministro de entre sus filas. Por ello, Muñecas eligió a su Ministro de entre las filas unionistas (autonomistas), llevándolo a Silvano Bores (a) "El Zorzal".<sup>6464</sup> A consecuencia de los resentimientos que existían en el Partido Autonomista con una fracción disidente (Pedro Alurralde y otros), Muñecas y sus amigos no estaban decididos a romper con ciertos Mitristas.<sup>6465</sup> El pacto o arreglo implícito fue hecho finalmente por Absalón Rojas, en representación de los Unionistas oficialistas, sólo con la facción moderada del Mitrismo (Méndez Gordillo, Cossio, etc.), y no con su facción radicalizada, llamados en Tucumán Prosperistas (por Próspero García (a) "Flor de Manzanillo").<sup>6466</sup>

La oposición radicalizada, constituida por Mitristas y Republicanos (los Padilla), principió por exigir que se repusiera en la Campaña a los Comandantes destituidos, se les diera el Ministerio de Gobierno, la mayoría de los Diputados a elegir próximamente,

etc.<sup>6467</sup> El ex-Gobernador Eudoro Avellaneda,<sup>6468</sup> que presenciaba las negociaciones entre Absalón Rojas, representante de los Unionistas oficialistas,<sup>6469</sup> y Miguel M. Nougués, representante de los Unionistas disidentes,<sup>6470</sup> al oír tales exigencias las reprobó indignado diciendo: "...eso es lo mismo que pretender deshonorar a una mujer para casarse con ella".<sup>6471</sup> La parte que se refería al Ministerio fue rechazada, acordándose sólo la que se refería a los Diputados, "...cediendo el Club Unión el número [de Diputados] que se le pedía a pesar de tener la seguridad del triunfo en todas partes".<sup>6472</sup> Arreglado el pacto o acuerdo sobre esa base, la oposición volvió "...con la exigencia de que el Gobierno promulgase una ley de elecciones de circunstancias, que fue dictada sobre tablas por los Mitristas y Republicanos unidos".<sup>6473</sup> Ante esta nueva exigencia, el Club Unión contestó

"...que no era P. E. de la provincia para escuchar esas proposiciones o exigencias y dio por roto todo arreglo [o acuerdo] comprendiendo que sólo se pretendía embrollar y hostilizar al Gobierno".<sup>6474</sup>

Por su parte, el Unionismo disidente representado por Nougués concluía que siendo imposible un pacto o arreglo con el Gobierno de Muñecas, era preciso coaligarse con los Diputados Mitristas "...para aumentar el número de nuestros diputados en la Legislatura y combatir el Gobierno".<sup>6475</sup> El círculo que rodeaba a Muñecas

"...sobre ser demasiado reducido y compuesto de personas que no pueden ofrecerle contingente alguno, se encuentra bastante anarquizado de modo que ellos mismos ven que no le ofrecen bastante apoyo al Gobierno para poder marchar".<sup>6476</sup>

Pero cuando llegaron de Buenos Aires los telegramas de Roca --quien ya se había proclamado candidato presidencial-- urgiendo la celebración de un pacto o arreglo entre las facciones Autonomistas, Rojas retomó su rol de conciliador y conferenciando con Nougués, acordaron finalmente

"...suprimir la lucha en la ciudad formando una lista mista de tres por parte de ellos [Unionistas disidentes] y dos por nosotros [Unionistas oficialistas] y en cuanto a la Campaña recomendar por nuestra parte algunos candidatos de ellos".<sup>6477</sup>

El pacto explícito, que merced a dicho telegrama se había acordado, salvó al Autonomismo disidente (Nougués y sus amigos) "...de un abismo a que marchábamos y del que no tenía escapatoria".<sup>6478</sup> Hecha la elección, los Republicanos (Sarmientistas) se confabularon con los Mitristas y rechazaron

"...todas las actas por las cuales resultaban elegidos diputados nuestros amigos [Unionistas], haciendo diputados a Mitristas y Republicanos que no han sido elegidos, [y que] ni siquiera tenían actas de su elección, ni buenas ni malas".<sup>6479</sup>

El organizador de la oposición contra el Gobernador Muñecas en la Legislatura fue el ex-Gobernador Federico Helguera "...haciendo el papel de Mama Huechuna".<sup>6480</sup> Helguera se había "...puesto de punta porque Muñecas, a cuya elección contribuyó, no va a pedirle órdenes por la mañana para gobernar".<sup>6481</sup> Para Pepe Posse, Helguera

"...no se avergüenza de haber huido del gobierno cobardemente, protestando mala salud, en presencia de las dificultades, y ahora la tiene buena y robusta para estorbar al Gobernador de su hechura".<sup>6482</sup>

Reconocer dicha Legislatura, que en ese entonces funcionaba como Colegio Electoral,<sup>6483</sup> tal como ella misma se había nombrado y organizado, con mayoría Mitrista y Republicana (Sarmientista}, que incluía a los Padilla y a Luis F. Aráoz,<sup>6484</sup> habría sido, para Pepe Posse, "...una derrota para el Gobierno [Autonomista]".<sup>6485</sup> Por otra parte, sería "...dejar como hecho y doctrina establecida que las Legislaturas pueden fabricar Diputados contra el voto popular".<sup>6486</sup> Sería también, despreciar la voluntad de los Departamentos

"...que han elegido por inmensa mayoría Diputados diferentes a los que la Sala ha entresacado de las actas, a título de amigos, ejerciendo voluntad soberana contra derecho".<sup>6487</sup>

Simultáneamente a un procedimiento tan irregular, las dos fracciones de la Sala buscaban, según Pepe Posse,

"...acuerdos con el Gobierno, no para servirlo sino para absorberlo, imponiéndose Ministro, Jefe de Policía, y luego proponiendo candidaturas para la Presidencia contrarias a la ya conocida por el Gobierno".<sup>6488</sup>

Para Posse, el Gobierno Autonomista debía desconocer el origen legal de la Legislatura que trataba de instalarse, vetándola.<sup>6489</sup> Los Nacionalistas y Republicanos habían

"...hecho iniquidades en el examen y escrutinio de las actas, han desechado a los Diputados que han obtenido mayor número de votos por ser amigos del Gobierno, y han dado por elegidos a los candidatos de la minoría, es decir a los suyos. Una de esas pillerías y barbaridades que solo podían hacer estos gauchos blancos".<sup>6490</sup>

Según Posse, en la elección no hubo vicios, pues los resultados

"...los han fraguado, pero si los hubiera habido lo constitucional habría sido mandar hacer nueva elección; puesto que había una voluntad conocida en favor de candidatos con mayoría de votos, de suerte que lo que ahora aparece es que la Sala y no los Departamentos es quien ha elegido Diputados".<sup>6491</sup>

De caer entonces el Gobierno, Posse especulaba "...prevalece la Legislatura, y como en ella hay mayoría Nacionalista el gobierno sucesor tendrá ese color".<sup>6492</sup> De este hecho se seguiría "...un cambio en Santiago combinado desde aquí [Tucumán] y apoyado por estos".<sup>6493</sup> Luego vendría, "...tentar en Salta y Jujuy movimientos en el mismo sentido para confirmar cuatro provincias a los fines de aquel partido".<sup>6494</sup>

Desde antes de las elecciones de 1879 se sabía que la Legislatura, dominada por la oposición, estaba dispuesta a rechazar las elecciones, pero "...jamás nos imaginamos que llegasen al grado que han llegado de fabricar diputados que no habían sido elegidos".<sup>6495</sup> Con el nefasto precedente sentado en Jujuy por la teoría de Sarmiento,<sup>6496</sup> las elecciones de 1879 en Tucumán vinieron a ser de los Mitristas, que a juicio de Benjamín Posse, "...no tienen mayoría en la Legislatura, único Juez, etc. que puede proclamar minorías".<sup>6497</sup> Contra una Legislatura hostil, en manos de Sarmientistas y Mitristas, al Gobernador Autonomista Martínez Muñecas no le quedaba ni siquiera "...el supremo recurso del veto".<sup>6498</sup> En otras palabras, la Legislatura rechazó

"...todas las elecciones en donde los Unionistas [Rochistas más Irigoyenistas] no tuvieron oposición [Chicligasta, Leales, Burruyacu]; y han aprobado los votos de las minorías favorables a ellos en los otros Departamentos".<sup>6499</sup>

Pero las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de consagrado el proceso de Organización Nacional. Salvo en Tucumán, la separación entre los Poderes Legislativo y Judicial no era absoluta.<sup>6500</sup> La razón que tuvieron los constituyentes para no darle a la Legislatura atribuciones judiciales como las que pretendía Sarmiento se explicaba y se justificaba, a juicio del ex-Senador Nacional José Posse,

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus miembros".<sup>6501</sup>

Preferible debía ser, según Posse,

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad de sus actos".<sup>6502</sup>

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la Sala u omnipotencia legislativa, era para Posse

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".<sup>6503</sup>

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía sosteniendo en la prensa:

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, porque la elección es un acto indivisible".<sup>6504</sup>

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y del decoro, que el Gobierno reconociera una Legislatura con Diputados que no hubieren sido elegidos por los pueblos de los Departamentos.<sup>6505</sup>

Frente a esta anómala situación, el Gobernador Muñecas vetó por decreto el ingreso de los Diputados electos y la Legislatura solicitó la Intervención Federal. Pero esta solución rupturista fue repudiada por el Presidente Avellaneda, quien logró que Muñecas diera marcha atrás con el decreto invalidatorio y también la Legislatura con el pedido de Intervención federal. Finalmente, Muñecas con el apoyo de Autonomistas (Avellanedistas) y Republicanos (Sarmientistas) proclamó la candidatura presidencial de Roca.<sup>6506</sup>

## **I-VII Conciliación en Santiago del Estero garantizada por el matriarcado**

En cuanto a Santiago del Estero, también perteneciente al subsistema político del Norte, por cuya supremacía política compitieron tradicionalmente Córdoba y Tucumán, a partir de su emancipación de la supremacía tucumana, hecho ocurrido en la década del 20.

Hasta la muerte de Manuel Taboada acontecida en 1875, los santiagueños, y también los catamarqueños (a través de Ramón Rosa Correa), fueron conducidos sin solución de continuidad por el Gobernador de Santiago del Estero Juan Felipe Ibarra y sus numerosos parientes. Entre ellos se destacaron: primero su sobrino segundo Mauro Carranza, y luego sus sobrinos carnales los hermanos Taboada. El fin de un prolongado período de equilibrio político forzado, bajo el mando autoritario de un clan familiar gobernante, necesariamente abrió una instancia de anarquía. Luego de fallecido Manuel Taboada y derrotados Mitre en La Verde y Arredondo en la segunda Santa Rosa,<sup>6507</sup> el "largo y tenebroso" reinado Liberal-Mitrista de los Taboada había terminado en 1876 --según afirmaba el Comandante Daniel Cerri-- merced a una primer intervención militar y

"...mediante los esfuerzos de la numerosa familia de los Santillán, Rojas y otros amigos apoyados en las fuerzas nacionales mandadas por el Cnel. Octavio Olascoaga".<sup>6508</sup>

El Cnel. Octavio Olascoaga,<sup>6509</sup> Comandante del 9 de Línea, enviado por Sarmiento a fines de su mandato (1874), había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",<sup>6510</sup> y había logrado --luego de la caída de los Taboada-- hacerse reputación de procónsul, o

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el gobierno provincial [Unzaga, Olacoea] es impotente para sostener por falta de recursos y de prestigio".<sup>6511</sup>

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse "...la simpatía de las mujeres (única cosa que le envidio), que en Santiago gobiernan a los hombres, de manera que es allí el Dios Chiquito".<sup>6512</sup>

Instalado a fines de 1876 como Gobernador Autonomista Gregorio Santillán Gondra,<sup>6513</sup> (a) "Don Goyo Suelas", el Ministro de Gobierno José María Corbalán,<sup>6514</sup> aspiraba a sucederlo en el período gubernativo siguiente. Pero Absalón Rojas, comenzó a oponérsele

"...desde que comprendí que todos lo odiaban y que su candidatura era imposible, pues se encuentra contrariado por una mayoría organizada en la Legislatura por mí".<sup>6515</sup>

En carta a Roca, Rojas le recordaba que

"...poco tiempo después de llegar a esta y cuando [José María] Corvalán [Ministro del Gobernador Gregorio Santillán Gondra] fue para Buenos Aires le escribí pidiéndole que al mismo tiempo de hacer valer su influencia para que el Presidente prestase su cooperación desidida a objeto de sostener esta situación contra los Taboada, se insinuase también para que a Corbalán se lo precisare a marchar de acuerdo conmigo".<sup>6516</sup>

Esto lo hacía Rojas, porque desde entonces comprendía

"...las tendencias de Corbalán y calculaba que muy luego tendríamos que chocar como ha sucedido después a consecuencia de que no he querido consentir de que él se haga el Arbitro de los destinos de Santiago".<sup>6517</sup>

Persuadido de que su candidatura a Gobernador era imposible, Corbalán "...se ha adherido a la del Cnel. [Octavio] Olascoaga, a quien muchos de nuestro partido lo proclaman como el único capaz de unir a todos y organizar esta provincia".<sup>6518</sup> En efecto, el Cnel. Olascoaga, Comandante del 9 de Línea, hacía política en el Norte por cuenta de Adolfo Alsina, Ministro de Guerra de Avellaneda, principiando

"...por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para estender su influencia y su partido en el Norte, ayudado por sus antiguos amigos los Navarros y Molinas en Catamarca y sus flamantes amigos los Padilla en Tucumán".<sup>6519</sup>

Las intrigas y planes políticos del Ministro Alsina, en el Norte, se revelaban también en el comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, como apoderado judicial de Manuel Taboada en Santiago del Estero. Su política era

"...albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, para mantener en jaque al Gobierno de Santiago y hacer necesaria la permanencia de las fuerzas nacionales y de su agente Olascoaga allí".<sup>6520</sup>

Como consecuencia de los desacuerdos entre Absalón Rojas y el Ministro de Gobierno José María Corvalán, Rojas se lamentaba que hubiera

"...venido la hostilidad directa en contra mía, al grado de emplear la fuerza pública y llegar hasta el asesinato en varios departamentos, para impedir el triunfo de mi candidatura para Diputado al Congreso, contrariando la opinión de casi todo el partido, que me era favorable de una manera decidida".<sup>6521</sup>

A pesar de todos los atentados producidos, Rojas triunfó en muchos departamentos,

"...pero las actas fueron tomadas por el Gobierno y retenidas en su poder por muchos días, de manera que, lo que no consiguieron el día de la elección, lo abra conseguido el fraude".<sup>6522</sup>

Para Prefecto Lugones, los que se llamaban Situacionistas,

"...no forman un verdadero partido y solamente los une el interés común contra Taboada, si bien no los veo unidos en la adopción de los medios, ni en los propósitos para lo futuro respecto de la Provincia, pudiendo fácilmente entreverse la división de intereses propios, que con tanta facilidad trae casi siempre la división respecto del interés nacional".<sup>6523</sup>

Lo que Lugones entreveía, es

"...una división entre dos familias [Pintos y Vieyras?] hoy, al parecer, perfectamente unidas, pero que en lo sucesivo y no muy lejos, en menos de un año quizá, pueden romper la unión tan poco firme, tan poco segura, casi ficticia, que las liga por el momento".<sup>6524</sup>

Lugones temía que la elección de diputados de 1879 sea

"...la causa de la división, pues cada una procurará llevar al Gobierno de la Provincia uno de su apellido, o de su sangre y de su casa".<sup>6525</sup>

Luego de elegido Gobernador Mariano Santillán Gondra mucho se hablaba en 1879 de que pretendía nombrar como sucesor a un miembro de su propia familia, un primo y concuñado de su hermano Gregorio, llamado Napoleón Zavalía Gondra,<sup>6526</sup> simpatizante de Dardo Rocha, y apoyado por el Comandante Olascoaga, por el ex-Ministro de Gobierno José María Corbalán y por el Diputado Nacional Absalón Rojas.<sup>6527</sup> En esa oportunidad, Zavalía fue vencido por los que se denominaban verdaderos amigos de Roca,<sup>6528</sup> llevando al Gobierno al Autonomista Pedro C. Gallo, que era Presidente del Comité formado por los Santillán, con quienes "...se hallaba vinculado por amistad, parentesco y servicios sin cuento".<sup>6529</sup> Pero para el Comandante Cerri, Gallo fue llevado a la Gobernación con la plata prestada por Luis Generoso Pinto, pues con ella

"...compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara que en su mayor parte se compone de los empleados a sueldo del gobierno, e hicieron elegir a un Gobernador [Pedro C. Gallo], que respondiera a sus propósitos cuando menos se lo esperaban los hombres definidos".<sup>6530</sup>

Inmediatamente, los amigos de Gallo destituyeron a los Diputados que "...sin ser enemigos le negaron su voto", reemplazándolos por los Taboadistas Dr. González Durand y Martín Herrera.<sup>6531</sup>

## **I-VIII            Conciliación en Córdoba desafiada por el periodismo**

Córdoba, correspondiente al subconjunto político del Centro, cuyo predominio político se lo disputaban el Autonomismo y el Liberalismo, tampoco estuvo exento de un progresivo fenómeno de fragmentación de su elite dirigente. En 1876, casi con la elección del gobierno Autonomista de Fernando S. de Zavalía, "...principió la división del partido Avellaneda en esta".<sup>6532</sup> El Ministro del Gobierno Autonomista Miguel Juárez Celman o "el muñeco de aserrín", como lo calificaba Pepe Posse, que se desempeñó en la Gobernación de Antonio del Viso, le anunciaba a Roca, que

"...dentro de poco tiempo todos los Departamentos estarán gobernados por personas de mi confianza, con quienes podré hacer lo que me dé la gana, y como la ciudad es la más difícil en atención a que yo no he sido jamás acaudillador de chuzma [epíteto de origen quechua para referir a la plebe], voy a organizar la Guardia Nacional en regla".<sup>6533</sup>

El partido Constitucional, conocido como Ruso (o mazorquero), había proclamado la candidatura presidencial del Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen,<sup>6534</sup> lanzada por los más empecinados.<sup>6535</sup> De esto ha resultado, a juicio del Ministro Juárez Celman,

"...que aunque todos reconocen en Irigoyen, talla y preparación para cualquier puesto, no lo aceptarán jamás aquí, proclamado por el partido ruso, basta esta iniciativa de los federales más recalcitrantes, para que la opinión se pronuncie tremenda contra el candidato".<sup>6536</sup>

Para Juárez, el Dr. Irigoyen comenzó sus trabajos políticos en Córdoba, "...cometiendo el gravísimo error de suponer que existe en Córdoba partido Ruso, y que la familia de

Achával no sucumbió para siempre, como entidad política con el famoso gobierno de D. Paio [José Pío Achával]".<sup>6537</sup> En 1878, Juárez Celman le informaba a Roca acerca de sus nuevos prosélitos, advirtiéndole que de los miembros del partido Ruso,

"...el mismo Achával y la gente honrada de los rusos, como Torres, los Yofres, Bustos, etc. nos pertenecen, pero es necesario cuidarlos, son muy amadrinados y a la larga, han de preferir cualquier candidato que sea de la ley federal pasada".<sup>6538</sup>

La oposición Laspiurista,<sup>6539</sup> de filiación Liberal Mitrista, frustrada en su intento fraudulento, si hubiera podido conseguir en Córdoba un voto de mayoría en el Senado, estaba a juicio del Ministro de Gobierno Miguel Juárez Celman, "...resuelta a parodiar a la Legislatura de Tucumán, rechazando nuestros candidatos aunque tuvieran mil votos y aceptando los de ellos, aunque solo tuvieran 5 o 6".<sup>6540</sup> Con motivo del nombramiento de Domingo F. Sarmiento, cabeza del partido Republicano, como Ministro del Interior de la presidencia de Avellaneda, y la consiguiente defunción de la política de Conciliación, en el periódico *El Pueblo Libre*,<sup>6541</sup> cuyo dueño y principal director era el Secretario de la Administración del Ferrocarril Sr. Julio S. Orótegui, antiguo editor de *El Jaspe*,<sup>6542</sup> se "...han desatado en groseros insultos contra él [Sarmiento]".<sup>6543</sup> Metidos en las porterías del Juzgado Federal y en las oficinas del Correo Telegráfico

"...difaman diariamente a la sociedad y al Gobierno, predicán a mansalva la revolución, proclaman a Tejedor, como al salvador de los pueblos y festejan los atentados del 26, como el principio de la restauración Mitrista".<sup>6544</sup>

En esta etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrisimo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del Mitrisimo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891.

### **Capítulo III-C-10 Pax Roquista o una paz beligerante**

#### **Índice**

- J-I Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político. Casos del Centro (Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos) (1881-1886).
- J-II Apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé.
- J-III Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso de Corrientes.
- J-IV Impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos.
- J-V.- Conclusiones

### **J-I.- Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político. Casos del Centro (Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos) (1881-1886).**

La compleja etapa de la Organización Nacional que se inició en los combates de Barracas y Puente Alsina (1880), que llevaron a la Federalización de Buenos Aires, a la consagración oficial de un fraude electoral sistemático, y al inicio de lo que luego se conoció como militarismo, se caracterizó según Gallo y Cortés Conde (1972), "...por la cesación casi total de los conflictos inter e intra-regionales".<sup>6545</sup> En la década del 80, resuelta la cuestión Capital, unificada la moneda, y agotadas las posibilidades de triunfo militar para la coalición opositora Mitrista, se constituyó informalmente una coalición oficialista procedente de diversas regiones geográficas, bajo el liderazgo de sus respectivos gobernadores, conocida como Liga de Gobernadores.<sup>6546</sup> En presencia de un boom económico y financiero excepcional --de resultados de causas internas como la denominada Conquista del Desierto (forjada a imagen y semejanza de la conquista española de América) pero en medio de la fase de estancamiento a nivel mundial correspondiente a la segunda onda larga de Kondratiev-- la lucha por la hegemonía, se dirimió en un combate eminentemente político.<sup>6547</sup> Sin embargo, no obstante la expansión económica registrada en el país, los procesos inflacionarios incidieron severamente sobre el equilibrio político. Cortés Conde (1989) ha insistido, a diferencia de lo sostenido por Williams (1920), que la emisión monetaria entre 1883 y 1885 fue considerable, y que el aumento del circulante "...solo compensó parcialmente la fuerte caída y la final desaparición de los depósitos como medios de pago".<sup>6548</sup>

La fractura política o transición por colapso (1880), que dio lugar a la llamada Paz o Unicato Roquista (1880-1904),<sup>6549</sup> algunos autores la denominan "revolución desde arriba",<sup>6550</sup> o revolución conservadora, o revolución pasiva, y se inició en la tercer década de la segunda mitad del siglo XIX.<sup>6551</sup> Es interesante destacar que esta etapa, que operó como reacción contra la transición política que significó la llamada Organización Nacional, coincidió con las fases de diversos ciclos. Con la fase de estancamiento mundial de la segunda onda larga de Kondratiev,<sup>6552</sup> con el segundo estadio de globalización de Mignolo (1995),<sup>6553</sup> con el cuarto ciclo ideológico de Rivarola (1936),<sup>6554</sup> y con la segunda etapa de crecimiento de Ortiz (1977),<sup>6555</sup> La génesis de esta fractura política, la encuentran diversos autores en: 1) la debacle de la hegemonía intelectual y moral del pensamiento liberal (Comuna de París, 1870); 2) la crisis económica mundial (1875), que marcó el inicio de la fase de estancamiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1870/75 a 1890/93);<sup>6556</sup> 3) la combinación de la partición de los mundos coloniales y neo-coloniales entre las metrópolis imperiales, con el auge del proteccionismo, del neo-colonialismo y del expansionismo nacionalista pan-Germano (Bismark), y con la dependencia informal --de la periferia mundial no formalmente colonizada-- al Imperialismo Británico;<sup>6557</sup> y 4) la regresión moral que significó el resurgimiento de viejos prejuicios racistas y antisemitas,<sup>6558</sup> la preponderancia de las virtudes empresariales y colonizadoras,<sup>6559</sup> la supremacía del afán de lucro o la pasión por el progreso material; y el interés por evolucionar o transformarse o acomodarse al compás de los cambios y las consignas políticas, que eran más de orden o paz que de progreso o administración.<sup>6560</sup>

La fractura de la coalición política Liberal, iniciada con la derrota del Mitrisismo en La Verde (1874) pero culminada con el triunfo de Roca en Barracas y Puente Alsina

(1880), obedeció al hecho que subsistían en el interior del país fracciones de elites cuyas prácticas políticas eran netamente oligárquicas; donde el clericalismo se resistía a perecer; y donde la hegemonía estaba monopolizada no por un partido político formalmente constituido sino por gobernadores-caudillos agavillados entre sí (Liga de Gobernadores).<sup>6561</sup> Luego de un breve interregno conciliador (1877-80) que fracasó estrepitosamente y hechos de armas que fueron iniciados por la facción radicalizada de la coalición opositora --con asiento en Buenos Aires-- la derrota militar de esta última definió la correlación de fuerzas. Esta correlación favoreció una alianza entre la facción reformista de la coalición oficialista y las facciones moderadas de la coalición opositora, concretada en un programa político consistente en la federalización de Buenos Aires y en el inicio de la denominada Pax Roquista. Esta realidad dio lugar en cada provincia, a nuevas coaliciones históricas y al nacimiento de nuevos conflictos. En ese sentido, en este trabajo, no nos planteamos el caso de Buenos Aires --por ser más conocido-- ni el de San Juan y Santiago del Estero por estar tratados en otros trabajos,<sup>6562</sup> sino el de las provincias del Centro (Córdoba) y del Litoral (Entre Ríos, Santa Fé y Corrientes), donde la hegemonía vino a ser disputada por:

- 1) una nueva elite política (parlamentaria) subordinada a los Poderes Ejecutivo Nacional y Provinciales;
- 2) una nueva y próspera burguesía terrateniente combinada con una burguesía financiera;<sup>6563</sup>
- 3) una nueva elite intelectual (cultural, educativa, artística y periodística), inspirada en el Evolucionismo (Darwin), el Positivismo (Comte, Spencer), el Modernismo (Darío, Rodó), y la disociación entre la tradición y el caudillismo;<sup>6564</sup>
- 4) un ejército nacional en pugna con los aparatos represivos provinciales (Guardias Nacionales);
- y 5) una nueva burocracia política, judicial y financiera (Comandantes de Armas, Rectores de Colegios Nacionales, curas afines al Autonomismo, Jueces Federales, Jueces de Paz,<sup>6565</sup> gerentes de bancos y corresponsales de diarios de la Capital).<sup>6566</sup>

Las elites oligárquicas del interior se propusieron, por un lado, producir una fractura o crisis orgánica en el orden político liberal y neutralizar a la región central y a las clases medias mediante compromisos, concesiones y reformas; y por el otro, excluir electoralmente a las masas rurales del interior y las clases trabajadoras urbanas, de la participación política, mediante el patriarcalismo, el compadrazgo, el clientelismo, el fraude y la proscripción. Pero, acaso:

- 1) ¿puede afirmarse, tal como lo hace Waisman (1987), que la última parte de la segunda mitad del siglo pasado, que corre desde la Federalización de Buenos Aires (1880) hasta la Ley Sáenz Peña (1912), fue de una democracia liberal en relativo equilibrio y expansión?
- 2) ¿el Liberalismo Autonomista logró aglutinar y configurar una voluntad colectiva en un partido revolucionario; conformar un nuevo orden intelectual y moral; y convertir su filosofía laica y su ideología del progreso en cosmovisión de masas y sus intereses en universales; o, por el contrario, pesó en él la inercia del clivaje o fractura centro-periferia o conflictividad interna vs. conflictividad externa (Liga de Gobernadores)?;

Asimismo, para evacuar este par de interrogantes debemos previamente formularnos otra serie subsidiaria de interpelaciones:

- a) ¿la etapa de fractura o de transición por colapso, de una ola política a otra, que se inició con la derrota militar del liberalismo Mitrista en La Verde (1874) y se continuó con la Revolución del 80 fue producto de una revancha de las elites Confederadas del interior Argentino (fractura regional o centro-periferia) contra las fracturas políticas producidas en Pavón (1862) y en la revolución porteña del 11 de Septiembre de 1852?
- y b) ¿la Revolución del 80 guardó alguna conexión con el fraude electoral sistemático en todas las provincias y con numerosos actos coercitivos locales (golpe de palacio registrado en Corrientes en 1881, crimen político acontecido en San Juan en 1884, y conductas atentatorias de las autonomías provinciales producidas en Entre Ríos, Santa Fé y Santiago del Estero) que pusieran en tela de juicio la naturaleza pacífica de la paz instaurada por Roca?

No siempre la política de los gobiernos electores seguía un patrón transparente. La variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, formulada por Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), sostiene la existencia de un tercer actor colocado por sobre las facciones en pugna y con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes. Y Pannebianco (1988), sostiene la tesis que la gestación de coaliciones políticas mediante sistemas confederativos constituye lo que denomina mecanismos de difusión territorial o de iniciativas locales espontáneas, que debilita a los partidos que nacen bajo sus auspicios. No obstante la aplicabilidad de esta última tesis a los orígenes del Autonomismo, en el caso del Autonomismo Nacional, el liderazgo y carisma personal de Roca lo fortaleció.<sup>6567</sup> Tal fue la centralización política provocada por el liderazgo de Roca, que desde Buenos Aires, rechazaba uno tras otro los candidatos a Gobernador de las provincias, sin que estas se atrevieran a cuestionar sus mandatos: en Corrientes convalidó la destitución del Gobernador Antonio Gallino; en Entre Ríos primero rechazó y luego apoyó la postulación del Gral. Eduardo Racedo; en San Juan primero combatió y luego apoyó el liderazgo del Senador Nacional Agustín Gómez; y en Santiago del Estero primero apoyó y luego destituyó al Gobernador Luis G. Pinto.<sup>6568</sup> Para los seguidores de Juárez Celman --que había llegado a la gobernación de Córdoba con la ayuda de los periódicos *La Carcajada* dirigido por Armengol Tecera, *El Sol de Córdoba* editado por la Logia Masónica, El Interior dirigido por Benjamín Posse, y el *El Progreso* conducido por el catamarqueño Ramón Gil Navarro-- esta actitud del Presidente no era algo fortuito, emanado de los sucesos mismos,

"...sino más bien la resolución sostenida y terca de quitar elementos [Electores] al único candidato [Juárez Celman] que puede ser una garantía para él, para su partido para el país!".<sup>6569</sup>

Y en cuanto al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman existían, según el Gerente del Banco Nacional Don Rafael de la Plaza,<sup>6570</sup> todas las razones para oponer un dique a dicho Gobernador

"...que se apodera por asalto de pueblos y gobiernos",<sup>6571</sup> refiriéndose sin duda al copamiento del gobierno de Santiago del Estero. Este límite era necesario "...para hacer ver

al Presidente que va por mal camino, que se aleja amigos, se enemista pueblos, y disminuye su influencia en el Congreso".<sup>6572</sup> En un argumento hipotético D. Rafael se preguntaba

"...¿Qué hará el Presidente y el gabinete el día no lejano, casi alumbrado ya, en que Juárez Celman se adueñe de 30 o 40 diputados? ¿Será el Presidente quien gobierne? No, por que no tendrá influencia en el Congreso, por que encontrará siempre una mayoría enemiga y los pueblos ¿Cómo podrán manifestar sus opiniones? Es sabido que diez hombres armados con la apariencia de la Justicia y de la ley, y el remington en la mano [se] imponen a pueblos de miles de habitantes".<sup>6573</sup>

Y en un alegato casi profético, D. Rafael continúa su misiva afirmando que

"...Luego un día o el otro habrá que clamar contra la tiranía contra la imposición, habrá que abogar por la vuelta al sufragio, por la vuelta al derecho del pueblo a elegir sus mandatarios; es decir, habrá que lanzar rayos y centellas contra el más alto y luego contra todos".<sup>6574</sup>

Por último, D. Rafael se preguntaba "...¿porqué dejar andar más camino y tolerarlo y apoyarlo y defenderlo?".<sup>6575</sup>

## **J-II El apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé.**

El apuntamiento de un sucesor por parte de autoridades nacionales era en las provincias un factor de intromisión y conflictividad externa, aunque el que recomendara fuera el propio Presidente de la República. El Diputado Nacional Sanjuanino Juan Crisóstomo Albarracín,<sup>6576</sup> aborrecía de las imposiciones, al extremo que en sus conversaciones "...opina que todo argentino debe trabajar porque los presidentes no impongan sus sucesores por ser estos funestos a la República".<sup>6577</sup> Cuando en Córdoba, el Gobernador Juárez Celman y el Presidente Roca pretendieron imponer al Senador Guillermo Moyano como Gobernador,<sup>6578</sup> el político Juarista José V. García,<sup>6579</sup> lo interrogaba por escrito a Juárez "...¿que necesidad les impele a dar semejante paso? ¿satisfacer un capricho?".<sup>6580</sup> Respondiendo a su propio interrogante, García le manifestaba a Juárez que

"...Los pueblos se cansan de los abusos de estar viendo en los puestos públicos a una misma persona, contrariando así a nuestro sistema republicano democrático que es de renovar las personas en los puestos públicos".<sup>6581</sup>

García le recordaba, que "...a los Juan Manuel [de Rosas], le saben salir Urquizas, y ahora debe ser algún Urquiza terrible, porque no tendrá ejércitos y no sé de que medios se valdrá para derrocar tiranos".<sup>6582</sup>

En Santa Fé, provincia perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía política la disputaban los Autonomismos Roquista, Juarista (anti-clerical), Irigoyenista (Bernardista o mazorquero) y Rochista, se rumoreaba que el Gobernador Simón de Iriondo, al igual que los Gobernadores Antelo de Entre Ríos y Gallo de Santiago del Estero, había entrado en colisión con el Presidente Roca, pues había intentado celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos Aires --manejado por Dardo Rocha-- para la instalación de sucursales. Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del

Interior Bernardo de Irigoyen, para ese entonces aspirante a la Presidencia de la República, quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del Congreso Nacional.<sup>6583</sup> Por ese motivo, Iriondo reveló al país las pretensiones del Presidente Roca de gobernar todas y cada una de las provincias que la componen aún en la parte de la soberanía no delegada y especialmente en todas las cuestiones locales de carácter electoral.<sup>6584</sup> Con respecto a las imposiciones de Diputados Nacionales, el Gobernador Iriondo se debatía en 1882 acerca de a que candidatos apoyar. Como se habían manifestado nuevas aspiraciones de jóvenes de muy buena posición, y como tampoco podía "...entrar a romper lanzas con mis amigos mismos por un Diputado preferí abstenerme aunque esta abstención me privara de un Diputado al Congreso".<sup>6585</sup> Acerca de la sucesión gubernativa de la provincia de Santa Fé,<sup>6586</sup> Rivarola (1908), refiere lo que oyó de un político, y cuenta que nuestro individuo de marras decía:

"...Pero si a ese X nadie lo conocía. El gobernador cesante Y no podía entenderse con el senador Z sobre la elección del sucesor. Entonces yo los reuní una noche en que el presidente debía venir para verse con ellos. Aquí en esta misma sala los arreglamos y decidimos que X fuese gobernador".<sup>6587</sup>

Según Rivarola el político era Carlos Pellegrini; la provincia: Santa Fé; y el presidente: el General Roca; y según mis propias deducciones el Gobernador cesante "Y" debe haber sido Simón de Iriondo,<sup>6588</sup> el Senador "Z": Pedro Antonio Echagüe, y el candidato a Gobernador "X" debe haber sido el propio cuñado de Iriondo, el Canónigo Manuel María Zavalla Comas.<sup>6589</sup> Y al año siguiente, en 1883, cuando al Gobernador Cándido Pujato,<sup>6590</sup> le fueron impuestos como candidatos a Diputados Nacionales, por las camarillas de familia, los Sres. Luciano Torrent (ex-Senador Nacional) y C. Yáñez, para el Diputado Nacional Eusebio Gómez, el primero

"...es un Mitrista de tradición, de enrolamiento actual y de compromisos notorios, y el segundo un joven tan inepto como inexperto, que creyendo que sus amigos vacilan con la muerte de Iriondo intenta abandonar cobardemente, pero con provecho, una posición escalada sin más títulos que la ciega obediencia al caudillo muerto".<sup>6591</sup>

Y cuando se debatió la candidatura presidencial de Victorino de la Plaza, en 1884, el Ministro José Gálvez,<sup>6592</sup> se presentó a casa de Manuel Fernández y le manifestó ser "...contrario acérrimo a su candidatura [la de Plaza] por considerarla peligrosa a Santa Fé (al partido Iriondista)".<sup>6593</sup> El Ministro Gálvez le pidió a Manuel Fernández no hablara de la candidatura de Victorino de la Plaza,

"...pues todos los Santafesinos debían cooperar al triunfo del Dr. Irigoyen que sería la más fuerte columna del Club del Pueblo, mientras que la de V. E. [Plaza] sería el entronizamiento de los Conciliadores capitaneados por el Dr. [Wenceslao] Escalante".<sup>6594</sup>

La presencia de los Comandantes de Armas en el escenario político era algo indispensable si se quería asegurar el triunfo. El político santafesino José R. Espíndola denunciaba que los Comandantes de Armas "...arrear, castigan, hieren, llevan a la cárcel a los que no obedecen de ir con ellos".<sup>6595</sup> Y el ex-Gobernador Camilo Aldao,<sup>6596</sup> le expresaba a Roca que

"...nuestros paisanos necesitan hechos prácticos y hasta ahora no ven sino a los batallones organizados, con el uniforme nacional, y otros formándose contra nuestras leyes".<sup>6597</sup>

Mientras el rochista Pedro Marisano le aseguraba al político Mariano Cabal Lassaga,<sup>6598</sup> que con la adquisición de los Comandantes Mateo Coria,<sup>6599</sup> Evangelista Lobos y Uladislao Acosta,<sup>6600</sup> "...y unos cuantos oficiales prestigiosos que lo seguirían creo haber puesto una pica en Flandes";<sup>6601</sup> la coalición situacionista u oficialista constituida por las familias de los Iturraspe y los Paredes acordaron reemplazar al Cnel. Silverio Córdoba,<sup>6602</sup> con el Cnel. Matías Barrera, "...con el objeto de hacerlo cargo de la Guardia Nacional de los Departamentos Rosario, San Lorenzo y General López".<sup>6603</sup> Un año más tarde, en 1885, Estanislao Zeballos se candidateaba a Gobernador,<sup>6604</sup> apoyado por el ex-Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman.<sup>6605</sup> Zeballos le adelantaba a Roca que los Coroneles Gaitán, Matías Olmedo y José M. Almendra, y los Comandantes Pérez y Fernández "...firmaron un compromiso aceptando mi candidatura, con el cual se han comprometido a venir por lo menos 900 hombres".<sup>6606</sup> Fracasada la candidatura de Zeballos, las elecciones provinciales se hicieron en Rosario, en 1886, a juicio de Camilo Aldao, "...como en tiempos de Iriondo, con el nuevo escándalo innecesario de venir a botar [sic] con la música del piquete disfrazada de paisano".<sup>6607</sup> Y en Rosario y la campaña, el rochista José Cabot,<sup>6608</sup> le adelantaba a Rocha que las elecciones "...serán reñidas y hasta puedo decir sangrientas".<sup>6609</sup> Para el 12 de Abril, fecha de las elecciones, Cabot se comprometió a conducir, desapercibidamente y a su propia costa, grupos de gente "...por los vapores, otros por el ferrocarril y el resto a caballo, subiendo el Arroyo del Medio".<sup>6610</sup> Entre quienes más esfuerzos desplegaron figuraban el Sargento Mayor Simeón Baez,<sup>6611</sup> y

"...por su influencia los Mayores Olegario y Gabino Gallegos con su jente, el Comandante Bazán con la suya, los Capitanes Bustamante y Gutiérrez con otros grupos, y muchos jefes del Carcarañá, Villa Casilda y San Lorenzo".<sup>6612</sup>

Y en tanto el partido Rochista no daba señales aparentes de vida, el Juarizmo "...reúne jente desde ahora y comprometido a triunfar a todo trance, la halaga, la arma y quizá la lance a la provocación y al desorden".<sup>6613</sup>

En oportunidad de debatirse en Santa Fé la sucesión del Irigoyenista Gobernador Pbro. Manuel María Zavalla,<sup>6614</sup> el Jefe Político Deolindo Muñoz le confiaba a Roca que "...la jente de sotana aliada a los Rochistas se ha puesto en campaña contra la candidatura de Gómez y Zevallos".<sup>6615</sup> A juicio de Félix Pujato, el Irigoyenista Pompeyo Pizarro, "...tiene dominados a los Iriondo, a Gálvez y demás; siendo este último especialmente su encarnación en el gobierno. Gálvez no es más que Pizarro".<sup>6616</sup> De todo ello resultaba que el poder oficial estaba

"...del lado de los clericales, demostrándolo así las listas de las comisiones directivas de lo que por sarcasmo se llama Club del Pueblo, pues figuran en ellas, desde los Ministros, Camaristas, legisladores y Jueces hasta las últimas jerarquías civiles y militares".<sup>6617</sup>

El Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que tiene el mayor número de simpatías era el actual Ministro Dr. José Gálvez, "...pues no solo cuenta con la buena voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de muchos de los que han sido siempre opositores a Iriondo".<sup>6618</sup> Sin embargo, para Pompeyo

Pizarro, los candidatos a suceder a Zavalla eran el Dr. Gálvez y el Dr. Gerónimo Cello, pues

"...los dos tienen opinión, tienen amigos y cuentan con el asentimiento del Gobernador que dispone de elementos electorales; habiendo entre los dos inteligencia perfecta para marchar de acuerdo y sin hacerse oposición, pues creo no equivocarme si está pactado entre ellos que el uno será Gobernador y el otro Senador al Congreso [como en efecto lo fue]".<sup>6619</sup>

Gálvez, con tal de ser Gobernador, jugaba a dos bandas pues se sometía simultáneamente al Rochista Alfredo Seguí y al Irigoyenista Pompeyo Pizarro.<sup>6620</sup> Y para hacer ver que en Santa Fé, la figura de Juárez Celman valía más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez Federal Gualberto Escalera y Zuviría, sugirió a Juárez Celman que en la candidatura a Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, se eliminara al hijo de Bernardo de Irigoyen, portador del mismo nombre.<sup>6621</sup> Apoyado decididamente por el Gobernador Zavalla, Gálvez tenía a juicio del Juez Escalera, las probabilidades del triunfo "...si a ello no se opusiera la prepotencia de [Agustín] Iriondo, con elementos en mi concepto de hacer una revolución con éxito".<sup>6622</sup> En cuanto a Zeballos,

"...no está siquiera en condiciones, por sí solo, de emprender una lucha que augure un resultado favorable. En su contra tiene tres fuerzas que le harían fuego de una manera decidida: el Gobernador, Iriondo y Muñoz".<sup>6623</sup>

Para José Antenor Pita, la opinión sobre Cello era la opuesta a la de Pizarro, pues

"...es un pretencioso y un gran flojo ya reconocido, que no es capaz de dar la cara de frente en situaciones como la presente, que solo requiere un poco de buena fe, y un mucho de firmeza de carácter".<sup>6624</sup>

Y para el citado Espíndola, hasta los parientes de Gálvez, como Rodolfo Freyre,<sup>6625</sup> dicen públicamente que "...por negocios sucios con los Roca y Cía. iba a ser Gálvez Gobernador, que por su misma familia lo sabía".<sup>6626</sup> Por último, desde Córdoba, Rafael de la Plaza concluía que Juárez Celman

"...se asegura Gobernadores que con poder y prestigio o sin él, hacen elecciones y las ganan canónicamente, hacen diputados que en el Congreso responden a Juárez y no al Presidente. Por ese camino cualquier día el Presidente y el gabinete se encontrarán maniatados, encerrados dentro de un círculo de hierro y, o marcharán por el rumbo que marque Juárez, o se encontrarán con una Cámara hostil que les cerrará el paso por todos lados".<sup>6627</sup>

Y en 1885, la proclamación de Bernardo de Irigoyen como candidato a Presidente de la República fué a juicio de Rodolfo Freyre,

"...lo más impopular, concurriendo a ella tan solo los de la familia reinante [Iriondo y Zavalla], entre los cuales figuran algunos que ayer hacían protestas de adhesión a su candidatura [la de J. Celman]".<sup>6628</sup>

Pero Irigoyen se equivocaba, pues a juicio del ex-Gobernador Camilo Aldao, "...no lo proclamarán aunque se lo prometan".<sup>6629</sup> Esta política versátil no era nueva en la familia reinante, y podía llegar a ser imitada por sus discípulos,<sup>6630</sup> pues cuando

"...subió el Sr. Sarmiento, se comprometieron con el Dr. [Eduardo] Costa a botar por [Rufino de] Elizalde, y con el Gral. Conesa, [se comprometieron a votar] por el Dr. [Adolfo] Alsina. Cuando estuvieron arriba botaron por el Gral. Urquiza, burlando a todos".<sup>6631</sup>

Si estuviera en sus manos hacer un Presidente, a juicio de Aldao "...lo harían a Rocha para vengarse de Vd. [Roca] pues recibieron como legado testamentario del finado Dr. Iriondo esa consigna".<sup>6632</sup>

Para comienzos de 1885, aparentemente los únicos candidatos a Diputados Nacionales por Santa Fé que gozaban de la confianza del Presidente Roca eran Nolasco Arias,<sup>6633</sup> y Desiderio Rosas,<sup>6634</sup> pero ambos, para el afamado criminalista Eusebio Gómez, "...no tienen talento, foja de servicios, ni merecimientos reales".<sup>6635</sup> Mientras el Ministro Gálvez, aparentemente inclinado a Juárez Celman, pretendía que primero se hicieran las elecciones de Electores para Gobernador y luego las de Diputados Nacionales, el Dr. Gerónimo Cello, los Iriondo y algunos mas pretendían lo opuesto. Estos últimos sospechaban que Gálvez trataba de jugarles una maniobra jesuítica, y le dijeron al Gobernador Zavalla "...que si acudían a lo que Gálvez le pedía en vez de Diputados Irigoyenistas irán al Congreso Diputados Juaristas".<sup>6636</sup>

### **J-III El Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso de Corrientes.**

En el caso de Corrientes, perteneciente al subsistema político del Litoral, la sociedad se encontraba inmersa en intensos vínculos reforzados, donde ambas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de una fractura pre-moderna de naturaleza lingüística (el idioma guaraní); y en una realidad donde esta conflictividad interna se hallaba también correlacionada con una conflictividad externa, disputada por el Autonomismo Roquista y el Liberalismo Mitrista. Corrientes fue la primera provincia en sufrir la conflictividad externa provocada por la prepotencia del régimen centralista Roquista. Se vivía en ella en 1880 en una situación de post-guerra civil, donde los Liberales o Mitristas, habiendo triunfado en la insurrección armada habían perdido el poder en la mesa de negociaciones a manos del partido que en Corrientes llamaban colorado, Autonomista o federal, que era casi en su totalidad Derquista (seguidor del ex-Gobernador Manuel Derqui). Habiendo la administración del Dr. Felipe Cabral y la Intervención del Dr. Miguel Goyena,<sup>6637</sup> dejado la provincia en un estado deplorable,<sup>6638</sup> hubo entre Manuel Derqui,<sup>6639</sup> y Antonio B. Gallino,<sup>6640</sup> una conciliación o armisticio de resultados de la cual asumió el mando como representante del partido Autonomista --la nueva denominación del partido federal-- el Dr. Rafael Gallino.<sup>6641</sup> Pero aparentemente esta conciliación entre Autonomistas no dio resultados.<sup>6642</sup> Como era necesario hacer triunfar la candidatura del Dr. Gallino, Evaristo Moreno concluye que

"...también era indispensable perseguir a los Derquistas y suplantarlos en los puestos públicos con hombres que no solo tienen un color político indefinido, sino que a mas tienen una reputación de pilluelos".<sup>6643</sup>

En Diciembre de 1880, contra la voluntad de Manuel Derqui, y a despecho del Partido Federal o Autonomista, pero con el apoyo de los periódicos *La Provincia* y *El Autonomista*, Rafael Gallino había transferido el gobierno a su hermano Antonio, y a su Ministro de Gobierno Octavio Gondra.<sup>6644</sup> Pero producida la reconciliación del Partido Federal, en Noviembre de 1881, el Ministro Gondra fue separado y reemplazado primero por el Dr. Rafael Gallino y luego por el Dr. Severo Fernández.<sup>6645</sup>

Este agitado período de la historia Correntina estuvo también marcado por la especulación con la tierra pública de las Misiones, pertenecientes hasta ese entonces al territorio de la provincia. Los especuladores, entre los cuales descollaban los mismos oficiales de las fuerzas nacionales acantonadas en la provincia, acostumbraban adquirir tierras en propiedad pagándolas con letras y documentos que finalmente no honraban. Estas y otras desavenencias, a juicio de Castello (1984), hicieron mella en la unidad del Autonomismo.<sup>6646</sup> La prensa opositora, representada por el periódico *La Verdad*, preparó a la opinión pública, descalificando a Gallino, que se resistía a entregar los territorios de Misiones a la Nación, y gestando un clima propicio al *putsch* militar o al golpe de estado.<sup>6647</sup>

En efecto, la noche del 1 de Abril de 1882, la fuerza nacional al supuesto mando del Coronel Rudecindo Roca,<sup>6648</sup> pero por obra de los orientales Alberto Aberasturi y Emilio Esquivel (que habían sido partícipes del homicidio del Gral. Urquiza) --en un procedimiento semejante al que quince años antes, en 1868, el Mitrisimo había sometido al Gobernador Evaristo López--<sup>6649</sup> secuestraron al Gobernador Gallino.<sup>6650</sup> A todas luces, los amotinados pretendieron simular la existencia de una insurrección popular, para así justificar su crimen. Tras amenazar a Gallino --pues al decir del Senador Santafesino Dr. Aureliano Argento "...nadie es dueño de su miedo"-- lograron arrancarle la renuncia al mando,<sup>6651</sup> sucediéndolo el Vice-Gobernador Ángel Soto (ver Apéndice R-I).<sup>6652</sup> Para el Diputado Nacional por Catamarca Carlos de la Vega, el ex-Gobernador de Corrientes Sr. Gallino "...fue traído secuestrado en la bodega de un buque a cuyo bordo venía el Presidente de la República".<sup>6653</sup> Esta inicua maniobra, que contaba con frondosos precedentes,<sup>6654</sup> se dio en denominar gallinicidio o gallinización, epíteto acuñado por las denuncias de *La Patria Argentina* (Buenos Aires), órgano de prensa dirigido por el periodista porteño José María Gutiérrez.<sup>6655</sup> Dicho atentado fue denunciado por el Senador Nacional Miguel Victorio Gelabert en la propia Cámara de Senadores de la Nación,<sup>6656</sup>

"...para recordar en toda época, que el Gobierno Nacional hizo deponer y aprehender por los soldados de un batallón de línea al Gobernador de Corrientes por el crimen de haberse mostrado refractario a los mezquinos propósitos que pretendía realizar en esa provincia [adueñarse de sus tierras Misioneras]".<sup>6657</sup>

Para ese tiempo, el gobierno de Soto había caído en una gran impopularidad pues la Legislatura Correntina no solo había aprobado la renuncia de Gallino, que todos sabían había sido arrancada con violencia, sino que también aprobó la cesión de una enorme porción de tierras para la formación del Territorio Nacional de Misiones. Esta operación fue hecha, al decir de Aristóbulo del Valle, contra toda prescripción constitucional pues las Legislaturas no estaban autorizadas a ceder poblaciones y territorios sin previa anuencia de una Convención Constituyente.<sup>6658</sup> Mientras tanto, para Derqui, los Mitristas "...no quieren vivir en paz, conspiran y si bien no les veo elementos para una revuelta formal, tenemos datos para creer que piensan en algún atentado personal".<sup>6659</sup>

Para 1883, se produjo en el partido Autonomista de Corrientes otra escisión, cuyos integrantes fueron a engrosar las filas de los partidarios de Gallino, quien a pesar de los sinsabores sufridos seguía activo. Juntos encararon una fuerte campaña contra el Gobernador Soto y la candidatura de su Ministro Derqui, apoyados por los periódicos *El Independiente* y *La Opinión*, y por el Gobernador de Misiones Coronel Rudecindo Roca, a quien habían postulado como su candidato.<sup>6660</sup> Finalmente, la Junta de Electores consagró por unanimidad al Dr. Derqui para Gobernador y a Joaquín Vedoya para Vice-Gobernador. Dos años más tarde, y con Derqui aún en el poder, el Coronel José Toledo,<sup>6661</sup> detuvo al Gobernador y al Vice, exigiéndoles la renuncia, pero la pronta intervención de las fuerzas federales al mando del Gral. Juan Ayala, el mismo que había reprimido con éxito la rebelión de López Jordán, pusieron fin al violento episodio.<sup>6662</sup> Para principios de 1886, Juan R. Vidal concibió un pacto entre el Autonomismo y el Partido Liberal. Una fracción del Liberalismo, encabezada por el Dr. Juan Esteban Martínez, firmó un acuerdo con Derqui, lo que provocó en aquél partido una nueva división, que lo neutralizó en la cuestión sucesoria nacional.<sup>6663</sup>

#### **J-IV El impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos.**

El prestigio internacional adquirido por el país, merced a su inusitado despegue económico, no asimilaba ya desequilibrios, desajustes o involuciones políticas sangrientas propias de otros tiempos.<sup>6664</sup> El impacto del centralismo porteño en el plano político interno o local no se eliminó a partir de la Federalización de Buenos Aires, sino que por el contrario se intensificó. En Entre Ríos --perteneciente al subconjunto político del Litoral-- la supremacía también la disputaban los Autonomismos Roquista y Juarista.

Triunfante el Febrismo en todo Entre Ríos desde fines de los setenta, y gobernando desde 1879 con su apoyo la provincia el Coronel José Francisco Antelo,<sup>6665</sup> se suscitaron profundas diferencias al momento de su sucesión. A la sucesión de Antelo aspiraban: a) el propio Febre, quien se había lanzado en 1880, apoyado primero por Roca y luego por Rocha y el periódico *El Demócrata*; b) Diógenes de Urquiza, quien fue proclamado en Agosto de 1881; y c) el General Eduardo Racedo, apoyado primero por el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman y el Coronel Daniel Donovan, y luego por el propio Roca y por el periódico *La Idea*, redactado por el trío formado por Ruiz, Balleto y Marcos Funes.<sup>6666</sup>

En un principio, a raíz de las elecciones legislativas celebradas en 1882, el Febrismo triunfó en toda la línea.<sup>6667</sup> Pero con motivo del frustrado intento del Gobernador Antelo de celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la instalación de sucursales,<sup>6668</sup> y las posiciones afines al Rochismo sustentadas por Febre y el Senador Sanjuanino Agustín Gómez, durante los debates sobre las intervenciones a Santiago del Estero y a Corrientes, estos últimos se vieron desplazados del favor presidencial.<sup>6669</sup> Cuando a través de Juan A. Mantero se supo en Entre Ríos la posición del Presidente Roca a favor de Racedo, Febre renunció a su candidatura.<sup>6670</sup> La hostilidad del Gobierno Nacional contra Antelo no se hizo esperar. Antelo acusaba en 1881 al General Juan Ayala,<sup>6671</sup> de contrariar la Circular emitida en 1880 por la Inspección General de Armas.<sup>6672</sup> Ayala se había trasladado en 1881 al Departamento de La Paz, con el exclusivo objeto

"...de mover elementos electorales, sirviéndose del ascendiente que le da su posición de Intendente de la Nación, para favorecer el triunfo de un candidato que me suceda en el Gobierno".<sup>6673</sup>

La denuncia de Antelo era sumamente grave por cuanto Ayala, envió Agentes a la campaña

"...para decir a los Oficiales de la Guardia Nacional, que nadie sino él como Intendente de la Nación tiene autoridad sobre la Guardia Nacional y que todos deben concurrir a su llamado el día que les indique, amenazando con el servicio en el Ejército de Línea a los que no cumplan sus instrucciones".<sup>6674</sup>

Entre los agentes enviados estaba el Jefe Político Comandante Félix Benavidez. El Gobernador Antelo se vió en el caso de destituirlo si llegaba a comprobar "...una participación indebida en el acto electoral...porque no puedo permitir que los Jefes Políticos hagan política por su cuenta o por cuenta del Gral. Ayala".<sup>6675</sup> Los piquetes del Ejército de Línea establecidos en La Paz y Paraná, que el Gobernador Antelo, solicitaba que se retiraran,

"...no tienen por el momento objeto práctico alguno ni responden a ninguna necesidad, tanto en el orden nacional como en el provincial, sólo sirven como una base a los propósitos electorales de los Jefes que los mandan y como una amenaza a los ciudadanos que no se inclinan y doblegan ante las pretensiones de esos mismos Jefes".<sup>6676</sup>

Al año siguiente, los Jefes de la Guardia Nacional y hasta los más insignificantes oficiales incurrían en usurpación de títulos y honores, pues a juzgar por las denuncias del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, las insignias del Ejército de la Nación eran llevadas por "...hombres que aprovechan del prestigio que ellas dan para influir en el ánimo de las masas en favor de tal o cual bando local".<sup>6677</sup> El Diputado Estanislao Zeballos denunciaba en 1882 que so pretexto de prepararse un levantamiento Jordanista, se destituía en Paraná, al Senador Provincial Domingo Comas; en Nogoyá, al Coronel Manuel Navarro; y en La Paz, al Tte. Cnel. Félix Benavidez.<sup>6678</sup> El Diputado Zeballos revelaba a la Cámara todo el poder con que contaba la lista oficial, compuesta en su mayoría por oficiales de la Guardia Nacional.<sup>6679</sup> Al poco tiempo, el Gobernador Antelo cedió el mando en el Vice-Gobernador Rodolfo Pita, quien fue el que convocó a elecciones y le preparó el campo a su sucesor practicando el gallinicidio de los empleados públicos.<sup>6680</sup>

Asimismo, los miembros de los comités electorales desempeñaban simultáneamente cargos en el aparato judicial. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia figuraba

"...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este Superior Tribunal formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los Jueces de primera instancia, que en Entre Ríos se llaman de Alzada, formaban parte de los Comités electorales".<sup>6681</sup>

También era moneda corriente que los jueces negociaran sus sentencias. Mientras el Juez Federal Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación Nacional se comprometía a fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra de los intereses económicos del Jefe Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L.

de Elía,<sup>6682</sup> pero cuando su candidatura fue reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el Ministro de Hacienda Juan Antonio Mantero, él mismo vecino de Concepción del Uruguay, le informaba reservadamente a su discípulo, el Gral. Roca, que sería fácil que

"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene vínculo que lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".<sup>6683</sup>

Asimismo la prensa Mitrista caía en claudicaciones. A juicio del Jordanista Evaristo Moreno, dicha prensa, que blasonaba de independiente, y que en la Revolución del 80 secundó al Movimiento Tejedorista, es la misma que --al igual que José Hernández desde *El Río de la Plata* defendió las atrocidades cometidas por los Barcenistas en la Puna contra poblaciones indígenas--<sup>6684</sup> quemando "...incienso al Gral. Racedo,...se ha puesto completamente a su servicio abdicando de su independencia y liberalismo tan decantado".<sup>6685</sup> Y el ex-Ministro Mantero, denunciaba a su discípulo de Concepción del Uruguay, el Presidente Roca, que la Oficina Telegráfica de Paraná, dirigida por Ramón Calderón, practicaba la censura telegráfica al consultar al Gobernador Gral. Eduardo Racedo "...si se pueden transmitir los telegramas a Buenos Aires".<sup>6686</sup> Esta realidad era para Mantero

"...un escándalo que hace mucho daño, máxime si se tiene en cuenta que tanto esta oficina como la del Paraná suponen que los telegramas dirigidos por mí a Salatierra tienen un alcance distinto de los demás, porque ellos han seguido toda la evolución política para la elevación de Racedo".<sup>6687</sup>

Y dos años más tarde, en 1885, Fernando Méndez le transmite al Diputado Nacional Luis Leguizamón,<sup>6688</sup> el despertar de un clima revolucionario. A ello Leguizamón le contestaba

"...diga a esos locos de que me habla que no hagan propaganda revolucionaria, eso es una locura, al menos por ahora, ningún movimiento en ese sentido tendría éxito, luego después desacreditaríamos nuestra causa".<sup>6689</sup>

Para Leguizamón, era preciso tener en cuenta "...lo que importa la opinión de los hombres conservadores, del comercio, que representan la riqueza de este país. No amigo, la época no es de revoluciones, es de lucha en otro sentido".<sup>6690</sup> Según Leguizamón, el Gobernador Gral. Racedo estaba desacreditado, pues "...no tiene elementos, no tiene hombres, no tiene gente de acción que lo acompañe. ¿Que hará un día de elecciones?".<sup>6691</sup> Cuando los pueblos se levantaban en masa "...como levantaremos al de esa provincia contra su mal gobierno", Leguizamón sostenía que las policías son impotentes para imponerse a los pueblos. En ese sentido, Leguizamón recomendaba la propaganda pacífica, pues se debía inspirar confianza,

"...que haya fe en el poder de las fuerzas populares y verá Vd. cuanto hacemos. No permita esas calaveradas, apague esa propaganda de revolución, que no conviene. Ah! hay mucho que hacer antes de llegar a extremos dolorosos, hay muchas combinaciones posibles, muchas transacciones que se pueden hacer".<sup>6692</sup>

La elite entrerriana se hallaba también fracturada en ese entonces, como la vecina provincia de Santa Fé, por la incidencia de un factor pre-moderno: el territorio o la geografía --que no padecían otras provincias como Tucumán o Córdoba-- en desmedro de otras fracturas puramente modernas.<sup>6693</sup> La fractura geográfica se manifestaba entre las localidades geográficas sufragáneas a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde existía

un fuerte arraigo Jordanista, y aquellas otras localidades identificadas con la ciudad de Paraná, donde el Autonomismo Roquista había sentado en el pasado reciente sus reales. Al tratarse en 1883 la cuestión capital entre quienes pretendían la sede en Paraná y quienes deseaban que permaneciera en Concepción del Uruguay,<sup>6694</sup> el Gobernador Gral. Eduardo Racedo, era acusado de rodearse

"...de gente non sancta traída de los Departamentos so pretesto de cuidar su persona. Tiene guardia de esos individuos a las ordenes del Comandante Díaz, traído ad hoc, y un oficial, hijo de este".<sup>6695</sup>

El pueblo de Concepción del Uruguay,<sup>6696</sup> a juicio del ex-Ministro de López Jordán, y amigo y condiscípulo de Roca, Juan Antonio Mantero,<sup>6697</sup> está

"...temeroso de estos aprestos bélicos que no encuentra como justificar o disculpar porque está fuera de las atribuciones de gobernante y este no puede hacerlo sino con algún propósito dañino".<sup>6698</sup>

No era para menos el temor, dado que Racedo trajo primero

"...cuarenta hombres y todos creímos que fuese exceso de presencia en un General acostumbrado a los combates pero siguen llegando en grupos de a cuatro y de a cinco, ya hay más de ochenta, y entre ellos asesinos alevosos, reconocidos que tienen un salvoconducto expedido por el Gobierno para que no puedan ser aprehendidos por vagos y criminales".<sup>6699</sup>

Los rezagos de una facción política. El caso del Mitrismo.

En lo que hacía al Mitrismo --proscrito desde el fracaso de la Conciliación Avellaneda-- éste estaba en plena decadencia política, pues

"...no existe en toda la extensión de la palabra y no crea que exajero, no pasan de seis los que mantienen el fuego sagrado, pues los demás se han plegado a la situación y han de concluir por ir todos a ella si se les acomoda en un puesto público cualquiera".<sup>6700</sup>

En 1883, cuando el Gral. Mitre viajó a Mendoza camino a Chile, a juntar material para su historia sobre San Martín y la campaña Libertadora, los Mitristas

"...tuvieron que recurrir a los de la situación para hacerle una manifestación de recepción y aún así fue el fiambre [fracaso] más completo por mas que La Nación hizo sonar el bombo hasta casi romper el parche".<sup>6701</sup>

Sin embargo, el Mitrismo no perdía las esperanzas de una resurrección política mediante una asonada militar. El Regimiento 12 de Línea, ubicado al sur de Mendoza, en Neuquén, pero procedente de Salta, se hallaba bastante desintegrado del resto del ejército nacional pues estaba compuesto según el Gobernador José Miguel Segura, casi en su totalidad de destinados (casi siempre criminales), los que intentaron sublevarse en 1881.<sup>6702</sup> Con ese motivo, el Diputado Nacional Joaquín Villanueva lo prevenía a Roca que

"...hay aquí personas altamente colocadas que se empeñan en aser [sic] una lamentable atmósfera a nuestro amigo [Ortega] por los lamentables sucesos que han tenido lugar en la frontera a su cargo, sucesos que no son estraños si se tiene presente, los malos elementos de que se formó y compone, el Batallón 12 de Línea".<sup>6703</sup>

Ortega era un gobernante muy combatido por el Mitrisimo, con quien no se escatimaba sorna alguna.<sup>6704</sup> A propósito del sumario sustanciado en el Fuerte de la Cuarta División, su Jefe el Gral. Rufino Ortega encontró el Fuerte "...hecho un infierno de chismes".<sup>6705</sup> Los Coroneles Benjamín Moritán,<sup>6706</sup> y Marcial Nadal,<sup>6707</sup> secundados por una culpable condescendencia del Fiscal, hicieron

"...cuanto han podido por formar cargos y acusaciones, transformando un proceso instruído a individuos de tropa por el crimen de sedición, en proceso contra los jefes de esos mismos soldados, por actos posteriores a aquel hecho".<sup>6708</sup>

Para 1884, el partido Mitrista --con excepción de San Juan y Corrientes-- no existía en todo el interior. Desde Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el periódico El Mendocino,<sup>6709</sup>

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos va a comer a todos sin peligro de que alguno se indigeste".<sup>6710</sup>

En Abril de 1885, con motivo de las elecciones presidenciales, Roca había traído ocho piezas de artillería para el Cuerpo de Serenos con que según J. Echevarrieta "...quieren militarizarnos del todo la Provincia, pues así conseguirán dominar a todo el **bajo pueblo** i cuartar (sic) las libertades públicas".<sup>6711</sup>

## **J-V.- Conclusiones**

Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de veto presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la propia Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fé, nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación casi total de los conflictos inter e intraregionales",<sup>6712</sup> no puede ser sustentada.

Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que

las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;<sup>6713</sup> que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;<sup>6714</sup> y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales.

Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones constituyentes),<sup>6715</sup> el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),<sup>6716</sup> la justicia (jueces federales),<sup>6717</sup> la información periodística (corresponsales de la prensa porteña),<sup>6718</sup> las comunicaciones postales y telegráficas;<sup>6719</sup> los clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).<sup>6720</sup>

### Capítulo III-C-11.- **Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición.**

#### **Índice**

- K-I.- De la Revolución del Parque (1890) a la frustración del Acuerdo (1893).
- K-II Resistencia al Acuerdo. El caso de Salta.
- K-III División en círculos. El caso de Catamarca.
- K-IV Manejo del crédito bancario.
- K-V Faccionalización de la política provincial. El caso de La Rioja.
- K-VI Frustración del Acuerdo.
  - K-VI-a El caso de Mendoza.
  - K-VI-b El caso de San Juan.
- K-VII .- Secuelas de la corrupción bancaria. El caso de San Luis.
- K-VIII Incidencia del cisma geográfico. El caso de Santa Fé.
- K-IX Rebeliones liberales.
  - K-IX-a El caso de Corrientes.
  - K-IX-b. El caso de Entre Ríos.

#### **K-I De la Revolución del Parque (1890) a la frustración del Acuerdo (1893).**

Un creciente proceso de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo tomaban el centro de la escena desplazando al fraude electoral, a los pactos y a las imposiciones sucesorias como mecanismos privilegiados de acceso al poder.<sup>6721</sup> Pareciera ser que en 1890 el Río de la Plata volvió a experimentar un enfrentamiento militar, para posteriormente, luego del Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 1897, registrar una nueva lucha eminentemente política.<sup>6722</sup> Las causas de la acentuación regresiva, practicada con la represión militar, en 1890, la atribuyen algunos autores a la pérdida --por parte de la burguesía mercantil-- de hegemonía intelectual a manos de una nueva burguesía terrateniente; y al temor de la burguesía mercantil a una movilidad política y social descendente, provocada por la emergencia de una nueva elite política de origen provinciano y una nueva burguesía terrateniente, derivada de la Conquista del Desierto y de la llamada entrega de la tierra pública.<sup>6723</sup>

Como es sabido entre las causales que desataron la crisis del 90, se destacó también la debacle financiera y la corrupción bancaria.<sup>6724</sup> La crisis del 90 marcó la reversión del segundo ciclo del primer período de expansión, registrado por Di Tella y Zymelman (1885-1892).<sup>6725</sup> Sin embargo, Suter (1995) aclaró que las crisis financieras en Argentina fueron breves debido a la presteza con que se superaron las fases de contracción económica.<sup>6726</sup> Es también sabido históricamente que los intensos y prolongados procesos inflacionarios, al generar abruptos cambios en la estructura del poder económico y enriquecer a algunos para empobrecer a otros, aceleran ficticiamente la movilidad social trasladando sus efectos nocivos en forma inmediata a la esfera política.<sup>6727</sup> Por el contrario, los procesos deflacionarios, al cristalizar los cambios en la estructura del poder económico, frenan la movilidad social.<sup>6728</sup>

Las rebeliones contra los gobiernos Juaristas, contra los gobiernos del Acuerdo Roca-Mitre y contra el nepotismo, fueron el común denominador que vinculó las inquietudes opositoras o revolucionarias producidas en todo el país y en cada una de las provincias. Sin embargo, el impacto de la Revolución del 90 no fue inmediato y no pudo en la mayoría de las provincias desplazar del poder a los gobernantes del P.A.N. En muchas de las provincias del Norte (Salta y Jujuy), del Noroeste (Catamarca y La Rioja), del Oeste (Cuyo) y del Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos), los gobiernos surgidos en tiempos de Juárez Celman lograron perpetuarse. Sin embargo, meses o años después aquel impacto se hizo sentir con retrasos diversos y con intensidad diferenciada. Esta realidad nos ha llevado a formular una serie de preguntas específicas:

a) ¿que factores intervinieron para que las rupturas y crisis políticas provinciales -- La Rioja en 1891 y 1898; Catamarca en 1898 y 1899; Tucumán en 1893; Santiago del Estero en 1890, 1892 y 1908; San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; San Juan en 1907; y Corrientes en 1893 y 1907 (Cuadro I)-- padecieran de una arritmia tan marcada?

b) ¿la coalición autoritaria en el poder, que reprimió la revuelta, obedeció a sentimientos paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por una movilidad política y social descendente?;

c) ¿guardó una relación de contagio directo la Revolución del Parque (1890) con las sublevaciones Radicales de Catamarca, La Rioja y San Luis y la rebeliones Liberales de Corrientes?;

d) ¿arrastraban estas provincias agravios anteriores que se ligaran con las reminiscencias de la dictadura Rosista y de la modernidad colonial-absolutista aún subsistentes en ellas?;

y e) ¿cuánto debían pesar en esta política los torniquetes económico (irrigación), bancario, periodístico, telegráfico y educativo?.

## **K-II La resistencia al Acuerdo. El caso de Salta.**

En Salta --perteneciente al subsistema político del Norte-- la hegemonía la disputaban en esta etapa pos-revolucionaria el Autonomismo Roquista y los Cívicos. El Gobernador Pedro José Frías (h),<sup>6729</sup> al igual que la mayoría de los Gobernadores,<sup>6730</sup> pudo a duras penas sortear el vendaval producido por la Revolución del Parque. Al mes de ocurrida la misma, en agosto de 1890, la opinión pública de Salta exigía

"...el cambio de Ministerio, y no está lejos el día que exija la renuncia del Gobernador Pedro José Frías, teniendo en consideración su procedencia Güemista o Carcanista,...pues la repulsión a la influencia del Senador [Martín Gabriel] Güemes se acentúa por hora".<sup>6731</sup>

También la oposición, constituida por los Cívicos, se dividió en Salta en dos facciones, por un lado los llamados disidentes, encabezados por Delfín Leguizamón Cobo,<sup>6732</sup> entregado políticamente al Dr. Ángel M. Ovejero,<sup>6733</sup> y por el otro los güemistas, encabezados por los Dres. Domingo Güemes Castro y Aniceto Latorre, ligados al Modernismo, facción política de orden nacional que respondía al liderazgo de Roque Sáenz Peña y que estaba nutrida por el Carcanismo (seguidores de Ramón J. Cárcano). La división fue acentuada por las elecciones de Senador en Rosario de Lerma y las elecciones municipales de la ciudad de Salta del 7 de diciembre de 1890

"...a tal punto que me parece muy difícil una aproximación entre los unos y los otros, [pues] hubieron balazos, cuchilladas, y pedradas y el consiguiente cortejo de una media docena de víctimas, siendo grande la irritación".<sup>6734</sup>

Al comienzo, la facción dirigida por Leguizamón se sirvió del Güemismo

"...con el cual a podido vencer en las dos elecciones mencionadas, y es probable que continúe en esta alianza, lo que sin duda sería un peligro para esta Provincia".<sup>6735</sup>

Si Leguizamón se descuidaba y seguía confiado en dicha coalición, manteniéndose en el gobierno el Dr. Frías, "...habría de temerse la vuelta del gauchito [Martín Gabriel] Güemes y de su influencia".<sup>6736</sup> En cuanto a las verdaderas motivaciones que movilizaban a los líderes de la oposición las opiniones diferían. Ángel Quirós le aseguraba a Roca que Delfín Leguizamón y el Gerente del Banco Nacional Pío Urriburu Castro,<sup>6737</sup> eran una suerte de arribistas u oportunistas, pues "...no son Mitristas ni Roquistas, y solo buscan apoderarse y asegurarse del Gobierno de la Provincia para restablecer su fortuna particular".<sup>6738</sup> Leguizamón no hacía otra cosa que preparar elementos para suceder a Frías, "...importándole muy poco que los Roquistas o los Cívicos ganen la jornada".<sup>6739</sup> Leguizamón era para Quirós "...un traficante político en toda la estención de la palabra: está arruinado y quiere hacer su fortuna por medios políticos buenos o malos".<sup>6740</sup> Quirós le aconsejaba a Roca que viviera

"...prevenido con esta clase de gente, entre la cual puedes contar al muy conocido Dr. Angel M. Ovejero, capaz de todas las claudicaciones posibles, y aquí nadie le tiene fé en esta ciudad".<sup>6741</sup>

Para sortear la descomposición que la aparición de Martín Gabriel Güemes,<sup>6742</sup> (a) "El Caballero de los Trapos Sucios", produjo en las filas del Partido Nacional, Uriburu y Leguizamón elaboraron una estrategia combinada. Para ello convinieron "...en aparentar cierta frialdad en nuestras relaciones".<sup>6743</sup> Habiendo creído Güemes en el rompimiento entre Uriburu y Leguizamón, creció en audacia y mostró todo su juego, pues a juicio de Uriburu, Güemes pertenecía al mencionado Modernismo, ya que

"...no es Acuerdista ni responde, de ninguna manera a la política del Gobierno. Está con la fracción radical del partido nacional [PAN], de la cual es jefe el Dr. Roque Sáenz Peña".<sup>6744</sup>

Dos años después, en carta de febrero de 1892, el ex-Canciller Francisco J. Ortiz le informaba a Roca que

"...aquí impera lisa y llanamente el Carcanismo puro con Güemes y Frías a la cabeza y les garanto que siguiendo esto así los electores para Presidente serán todos Sáenz-Peñistas".<sup>6745</sup>

Frías sigue, a juzgar por una carta del periodista Ricardo López,<sup>6746</sup>

"...más las impresiones del corazón que las de la política puesto que en ningún caso puede llamársele a Frías un hombre político. Jamás ambicionó la gobernación ni puesto alguno; aceptó el gobierno porque se lo exigió Güemes, y en él no se ha cuidado nunca de hacer círculo ni crear prestigios para ulterioridades. Es un hombre bueno, moderado, pasivo, en otras circunstancias nacionales sería un buen patricio".<sup>6747</sup>

El peligro que significaba la renuncia de Delfín Leguizamón al Ministerio de Gobierno, era que Frías, dada su bondad y su ninguna aspiración política quedara obediente a las inspiraciones de Güemes. Si Frías llegaba a nombrar un Ministro de Gobierno de filiación Güemista, a juzgar por lo que Ricardo López le transmitió a Roca, "...Leguizamón en ocho días estaba perdido".<sup>6748</sup> Sin embargo, al año siguiente, Leguizamón sorteó la situación y alcanzó la gobernación. La transitoria coalición de Güemes con el Gobernador Leguizamón,<sup>6749</sup> al contar con "...la impunidad altamente anti-política del Gobernador, tratan a capa y espada de hacer triunfar las candidaturas [a Ministros de Gobierno y Hacienda] de [Pedro José] Frías y [Carlos] Grande".<sup>6750</sup> En cuanto a Carlos Grande,<sup>6751</sup> aparentemente representaba a las clases más bajas de la población salteña, por cuanto Ángel M. Ovejero le confesaba a Roca, que la candidatura de Grande, su primo segundo,

"...todos la repudian como una vergüenza...pero es bueno que Vd. sepa para que juzgue lo que pasa en esta sociedad, que hasta hace ocho años su profesión era comediante en las aldeas de Chile".<sup>6752</sup>

El eventual triunfo en su designación como Ministros de Frías y de Grande sería, en opinión de Francisco F. Cornejo Usandivaras,<sup>6753</sup> un triunfo del Modernismo, "...con el cual Güemes pretendería justificar su influencia en esta provincia".<sup>6754</sup> Ovejero contaba, a juicio de su aliado Francisco F. Cornejo, "...con todas las simpatías de la gente decente, y

tiene a su favor todos los elementos sanos del partido Nacional tanto de aquí como de la campaña".<sup>6755</sup> Por el contrario, para López, los Modernistas, o sea Güemes,

"...se creen aquí lo que realmente son: nulos, desalojados, mejor dicho vendidos. Conocedores de que por sí solos son impotentes para reconquistar esta posición, no es pues extraño se valgan de los radicales, seguros de quedarse con toda la ganancia".<sup>6756</sup>

A comienzos de 1895, el partido Nacional continuaba dividido en dos facciones, la Güemista, coaligada con Delfín Leguizamón, y la llamada facción disidente, ex-Juarizta, que fueran miembros de la Sociedad "El Edén".<sup>6757</sup> En cuanto a Delfín Leguizamón, este era para Pío Uriburu

"...hombre de espíritu versátil, sin ideas ni propósitos serios de gobierno, únicamente obedece al temor de una liga de mis amigos con los Ortiz y los radicales, y sólo por este temor puedo hacerlo entrar en vereda".<sup>6758</sup>

En cuanto a la Sociedad "El Edén", sus miembros eran los que --apenas Roca había dejado el poder-- "...no trepidaron en desconocerlo como Jefe del Partido Nacional", y que cuando Roca volvió de Europa no quisieron firmar el telegrama que Francisco F. Cornejo y otros le dirigían "...felicitándolo por su regreso feliz a la patria, de temor a disgustar a Juárez y Güemes".<sup>6759</sup> Eran también los que representaban "...la política desastrosa de la época pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y dejaron exhaustas las Cajas del Banco Provincial".<sup>6760</sup> No obstante estos estigmas, era indudable, para Francisco J. Ortiz, que la facción disidente representaba

"...la mayoría en cantidad y calidad del partido Nacional, no obstante que hay entre ellos muchos elementos de Güemes que están hoy retirados pero que volverán cuando su gente suba".<sup>6761</sup>

Entre estos últimos, el caso del Senador José Antonio Chavarría,<sup>6762</sup> era el más ostensible por estar sospechado de haber incurrido en peculado, por cuanto estaba

"...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] Güemes por el negocio de los \$118.000 que se hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el Banco y que la Legislatura declaró pago ilegal".<sup>6763</sup>

Leguizamón buscó en un momento por medio de la designación de su tío político Antonino Díaz Ibarguren,<sup>6764</sup> como Ministro de Hacienda e interinamente de Gobierno, la estabilidad en el cargo como Gerente del Banco Nacional de Pío Uriburu.<sup>6765</sup> Asimismo, Leguizamón se había propuesto dejar como sucesor a su Ministro Antonino Díaz, pese a la oposición de Pedro J. López Cornejo y Juan Cornejo, y con el apoyo de aquellos que se habían retirado del Partido Nacional

"...cuando los Juariztas (hoy del grupo disidente) impusieron el nombramiento de Jefe único del P.N. al Dr. Juárez y al Dr. Güemes en lo provincial,...para volver a él cuando [Francisco F. Cornejo] lo reorganizó después del 90".<sup>6766</sup>

Para el Senador Francisco J. Ortiz, Díaz era "...un imbécil completo, pero que le garante su senaturía próxima a [Delfín] Leguizamón y a Pío Uriburu, que también está en el complot".<sup>6767</sup> Fuera de Pío Uriburu, no tenía Leguizamón, según Ortiz,

"...un sólo hombre que represente algo, y su circulillo es de los dos Grandes y algunos empleados, y Pedro López [Cornejo], que se pasa [de bando] cada cinco minutos".<sup>6768</sup>

Los que decían que la candidatura Díaz era impuesta por su sobrino Leguizamón faltaban, según Cornejo, a la verdad, por cuanto "...somos los hombres de la situación, sus amigos los que hemos prestigiado esta candidatura consultando la opinión de la Provincia".<sup>6769</sup>

Por el contrario, la facción disidente del Partido Nacional (ex-miembros de la Sociedad "El Edén"), viendo "...la imposibilidad de que tengan el apoyo de la opinión algún miembro de su diminuto grupo",<sup>6770</sup> procuraban según Francisco F. Cornejo, "...por todos los medios de conseguir introducir la división en el Partido Nacional".<sup>6771</sup> La estrategia adoptada por este grupo minoritario consistía en proponer un día

"...apoyar la candidatura de [Rafael] Usandivaras, otro día la de Pedro López [Cornejo], otro la de Juan Cornejo, otro la de Arturo Dávalos Isasmendi, siempre con el propósito de introducir la discordia y desquicio en el seno del partido".<sup>6772</sup>

A todo esto, el Gobernador Leguizamón seguía "...hecho una esfinge impenetrable",<sup>6773</sup> y en Diciembre de 1895 dudaba de los candidatos a Diputados Nacionales, por cuanto le escribía a Roca inquiriendo acerca de cuatro candidaturas en danza: la de Arturo Dávalos, la de Indalecio Gómez, la de Francisco F. Cornejo, y la de Carlos Grande.<sup>6774</sup> Gómez le decía a Delfín Leguizamón que Roca consideraba que Díaz "...no podía exigirme que apoyara la elección de su cuñado [Francisco F. Cornejo]".<sup>6775</sup> Dicha opinión de Roca, le había causado a Leguizamón

"...viva satisfacción, porque me sería muy violento apoyar en febrero la elección de Díaz para Gobernador, y en Marzo la elección de su cuñado para Diputado".<sup>6776</sup>

### **K-III La división en círculos. El caso de Catamarca.**

En Catamarca --provincia correspondiente al subsistema político del Norte, y donde la supremacía la disputaban el Autonomismo, los Católicos y los Cívicos-- con motivo de los sucesos revolucionarios acontecidos en Buenos Aires en Julio de 1890, el gobierno de José Dulce (sucesor de Daza) quedó minado en su legitimidad. Por esa razón el gobierno de Catamarca al igual que el de San Juan de Alejandro Albarracín o el de Mendoza de Oseas Guñazú, idearon mecanismos de evolución para sortear la situación adversa. El Gobernador Dulce llevó al Ministerio de Hacienda al Dr. Francisco de la Vega y al Ministerio de gobierno a Gustavo Ferrari,<sup>6777</sup> "...en virtud de un acuerdo de todos los partidos en que era el principal factor el Diputado Nacional Rafael Castillo, como un acto de deferencia a la opinión pública".<sup>6778</sup>

Al mes de ocurrida la Revolución de 1890, la opinión estaba, a juicio del Senador Nacional Manuel F. Rodríguez Vega,<sup>6779</sup>

"...dividida hasta el infinito y la anarquía política reinando en todo su apogeo. Todos quieren formar círculos y ser candidatos a la futura gobernación de la Provincia: los Dulcistas, Figueroístas, Leivistas, Cívicos, Acuñaístas, Católicos, etc.". <sup>6780</sup>

Prescindiendo de las múltiples subdivisiones en el orden local, Rodríguez apuntaba que

"...solo quedan dos grandes agrupaciones: el partido nacional que lo componen sus amigos, los Dulcistas y los Figueroístas, y los de la Unión Cívica, presididos por [Guillermo] Leguizamón".<sup>6781</sup>

Los Católicos, en los que predominaba la influencia del Vicario eclesiástico José F. Segura, "...no irán seguramente con el Dr. [Guillermo] Leguizamón, aunque sean Cívicos los clericales de la Capital Federal, porque hay abismos insalvables de por medio".<sup>6782</sup> Para el ex-Ministro de Gobierno Lúder B. Sotomayor,<sup>6783</sup> los círculos en que se hallaba dividida la provincia eran: el Autonomista (Dulcistas) "...donde está Figueroa y varios de los antiguos Castristas [anti-clericales]"; el Rodriuguista, "...donde están ambos Rodríguez y familia"; la Unión Popular, "...donde están los Católicos, los jóvenes catamarqueños que viven fuera y el resto de los antiguos Castristas"; y por fin los Cívicos "...o antiguos Molinistas Navarristas, ya muy desmembrados".<sup>6784</sup> Esta anarquía, se acentuaba, a juicio de Sotomayor, en los Departamentos "...con la creación de círculos locales independientes que se declaran no pertenecer a ninguno de los de la capital y procederán como más les convenga".<sup>6785</sup>

En agosto de 1890, el ex-Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo Figueroa,<sup>6786</sup> interesado en defender a su cuñado el Gobernador Gustavo Ferrari, le confesaba a Roca que

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, han fraguado una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el nuevo Directorio del Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas amigos que Vd., se lo comunico para que evite el golpe si hubiera de hacerse".<sup>6787</sup>

#### **K-IV El manejo del crédito bancario.**

A la anarquía en la elite política y la administración pública se sumaba el desprecio por la justicia y por la honestidad en el manejo del crédito bancario. Al prometer el Gobernador Ferrari, inspeccionar "...aquel banco provincial de Catamarca, que era una especie de ministerio de Eleusis, y sobre el cual recaían tantas acusaciones",<sup>6788</sup> se desencadenó un clima golpista. En 1891, el Gobernador Ferrari, en su enfrentamiento por la nominación del Senador Nacional,<sup>6789</sup> con la facción denominada Separatista, liderada por Rafael Castillo,<sup>6790</sup> declaró cesantes a todo el Senado y la Corte de Justicia.<sup>6791</sup> Por ese y otros motivos se produjo en Junio de 1891 un levantamiento revolucionario liderado por los Cívicos que derrocó al gobierno de Gustavo Ferrari e instaló una Junta o Triunvirato presidido por Guillermo Leguizamón.<sup>6792</sup> La Revolución de Junio de 1891 había sido hecha, según el Diputado Félix T. Avellaneda,<sup>6793</sup> "...por mercenarios traídos por quebrados deudores a los Bancos de aquí".<sup>6794</sup> Pero la provincia fué intervenida por el Gobierno federal, recayendo la intervención en Juan Carballido. El Gobernador Ferrari fue repuesto en su cargo y designado su cuñado Figueroa como Senador Nacional.<sup>6795</sup> Con respecto al aparato judicial, el Diputado Rafael Castillo, líder de la facción separatista del PAN, denunciaba en la Cámara de Diputados en 1892 que

"...al poder que debía administrar justicia, a ese poder encargado de impedir que el poder ejecutivo extralimitara la órbita de sus facultades constitucionales y legales, a ese no se le daba ni papel ni tinta para escribir sus resoluciones".<sup>6796</sup>

El Banco Provincial no había quedado inmune a la violenta ruptura política (golpe de estado) ensayada, pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y tantos pesos del banco. A juicio del Procurador Fiscal, en el saqueo estaban complicados "...los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales".<sup>6797</sup> El partido radical estaba formado, según el Diputado Nacional Juan J. Ibáñez,<sup>6798</sup> "...por los sedimentos de la antigua dominación de los Navarro y de los Molina".<sup>6799</sup> Eran,

"...los descendientes del apellido, individuos que creen que el poder les corresponde por derecho propio [herencia], que se imaginan que el prestigio se hereda como se hereda el nombre, sin comprender que si bien puede heredarse el prestigio, es cuando primeramente se han heredado las virtudes".<sup>6800</sup>

A juicio del Diputado Ibáñez el gobierno de su pariente Ferrari vino a introducir ciertas mejoras en la administración de justicia, pues "...debo decir que se hablaba de una justicia donde se vendían las sentencias como se vende objetos de mercado".<sup>6801</sup> Dos años después, en 1893, Catamarca vuelve a sublevarse, con gran incidencia de parte de Santiago del Estero.<sup>6802</sup> En virtud de los sucesos revolucionarios de 1893, contra el Gobernador Gustavo Ferrari y el nepotismo instaurado en la misma,<sup>6803</sup> las vinculaciones entre las provincias vecinas de Catamarca y Santiago del Estero se resintieron.<sup>6804</sup> De resultas de dicha revolución el Ministro del Interior Wenceslao Escalante,<sup>6805</sup> conspicuo dirigente del PAN, se vió obligado a presentar la renuncia.<sup>6806</sup>

#### **K-V La faccionalización de la política provincial. El caso de La Rioja.**

En La Rioja, provincia correspondiente al subconjunto político del Centro, su hegemonía se hallaba profundamente dividida entre el Autonomismo, los Cívicos Nacionales, y el Radicalismo. El Gobernador Joaquín V. González,<sup>6807</sup> al igual que la mayoría de los Gobernadores de provincia, con excepción de los de Córdoba y Tucumán, que eran los más próximos a Juárez Celman, pudo sortear el vendaval producido por la Revolución de Julio. En 1891, para González, el grupo presidido por su primo o tío el ex-Gobernador Guillermo San Román,<sup>6808</sup> un ex-rochista que había devenido o evolucionado en Juarista, pariente del entonces Senador Nacional Francisco Vicente Bustos,<sup>6809</sup> era

"...radicalmente mi enemigo, y mientras conferencian, tratan de minar el edificio en que me asiento, haciendo telegramas a La Nación en que me injurian y me calumnian, y su periódico en esta infunde desconfianzas sobre mi actitud hacia ellos".<sup>6810</sup>

Cuatro años después, en 1895, según el ex-Rochista y ex-Juarista Guillermo San Román, la opinión Riojana estaba dividida en cuatro facciones: Bustistas, Barristas, Gonzalistas, y Lunistas o Radicales. A su vez cada una de estas facciones "...tienen sus subdivisiones en círculos de familia, que toman nomenclatura y tendencias del nombre y tendencias de la familia, que les sirve de centro".<sup>6811</sup> Los elementos Radicales "...no tienen importancia como potencia política, y jamás podrán imponerse en una lucha de esa naturaleza, por más libertad que se les acuerde".<sup>6812</sup> En cuanto a la facción Bustista, seguidora de Bustos, era para San Román "...la que tiene más número y mayor cohesión, pero también por sí sola, sería impotente para imponerse en una elección, libre de la influencia oficial".<sup>6813</sup> Esa misma facción del Partido Nacional, encabezada por Bustos, Nicolás Barros,<sup>6814</sup> y Marcelino Reyes,<sup>6815</sup> se apoyaba en oportunidad de las elecciones realizadas en abril de 1895 en el nombre y la influencia de Carlos Pellegrini, "...a quien cargan las iniciativas de

esta oposición tan gratuita como ruin, de última hora".<sup>6816</sup> La facción Gonzalista, seguidora de Joaquín V. González, reforzada por otros elementos del Partido Nacional que habían trabajado por el ex-Diputado Nacional Adolfo Dávila, proclamaba la candidatura del ex-Ministro de San Román, el Dr. Leónidas Carreño.<sup>6817</sup> Carreño era, a juicio de Reyes (1916), de los políticos "...que se titulan evolucionistas [transformistas]", era uno de los

"...de 'las entrañas' del roquismo, cuando las oligarquías provincianas manejadas desde la casa de gobierno de la Capital Federal--llegando al poder, por un acaso, Figueroa Alcorta, [Carreño] se hizo de 'las entrañas' del figueroísmo, y como se sabe Figueroa siguió una política opuesta a 'los Roquistas', llegado al poder Sáenz Peña, que también se apartó de las huellas de su predecesor, Carreño se hizo Sáenzpeñista, y si es que no muere de Senador Nacional, a la fecha sería Placista [por Victorino de la Plaza]".<sup>6818</sup>

El partido Mitrista, o sea la Unión Cívica Nacional, era, en opinión de San Román,

"...la base histórica del antiguo partido liberal, que dio organización y libertad política a la República, después de la disolución de la antigua Confederación del Paraná, y de la reincorporación del Estado de Buenos Aires al seno de la Nación".<sup>6819</sup>

Habiendo quedado el Partido Radical "...dividido y deshecho como influencia electoral", restaban en abril de 1895 en el juego del dilema como únicos candidatos a jugadores: el Bustismo con Francisco V. Bustos y el Gonzalismo con Leónidas Carreño, ambos del Partido Nacional, "...el uno viejo ya gobernante, el otro hombre de la nueva generación".<sup>6820</sup> Bustos tenía a su favor un círculo de amigos importantes y decididos (Máximo Reyes, Lídoro J. Avellaneda y Arturo Castaño), "...compuesto en su mayor parte, de Chilenos, españoles y personas de otras provincias";<sup>6821</sup> y Carreño contaba con la opinión casi en masa de la Provincia, "...no precisamente por simpatías a su nombre, sino por las naturales resistencias que Bustos se ha creado en dos períodos de gobierno en propiedad y una parte de otro como interino".<sup>6822</sup> Hasta los prolegómenos de la elección no era

"...posible decidir cual de los dos candidatos prevalecerá, porque los dos tienen elementos populares y cuentan a la vez con posiciones oficiales en las Secciones electorales de la Provincia".<sup>6823</sup>

De dicha elección, habría de surgir, según San Román, un gobierno fuerte,

"...porque representará el predominio de las mayorías en la Provincia que son siempre mayorías, aunque se hallen al servicio de las malas causas, cuando ellas se desenvuelven y chocan libremente en los debates democráticos".<sup>6824</sup>

Practicadas las elecciones el 2 de abril de 1895, Bustos resultó completamente derrotado en todos los Departamentos, con sólo la excepción de Sañogasta y La Madrid. Sin embargo, los comicios fueron impugnados por Bustos, quien logró formar un Colegio Electoral paralelo, lo cual requirió en Julio de 1895 la inmediata intervención de la provincia. El propio Leandro N. Alem, en el debate suscitado en el Congreso Nacional, condenaba la situación prevaleciente en La Rioja expresando que

"...cuando la idea general de la patria desaparece, cuando ellos tienen presentes los intereses personales, los intereses de círculo, entonces ya pierden completamente el carácter de partidos: se convierten en verdaderas facciones, y entonces son factores siniestros, perjudiciales, porque vienen a desgarrar siempre el seno de la patria, y porque todo lo vienen a posponer ante las conveniencias y los intereses personales y de círculo".<sup>6825</sup>

## **K-VI La frustración del Acuerdo.**

### **K-VI-a. El caso de Mendoza.**

En Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, como consecuencia del fenómeno revolucionario, el Gobernador Oseas Guiñazú Estrella,<sup>6826</sup> al igual que la mayoría de los gobernadores, pudo mantenerse en el cargo. Entre las facciones políticas en que se encontraba dividida la política mendocina se hallaban los Mitristas o Acuerdistas, los Orteguistas, los Guiñazuístas, los Lencinistas y los Liberales Civitistas. Los Mitristas se habían extinguido al extremo de formar "...un cuadro de estado mayor de un cuerpo de ejército que desapareció, dejándoles las pretensiones del mando, el orgullo de la historia y la impotencia para la acción presente".<sup>6827</sup> Por el contrario, los Lencinistas estaban dirigidos por un joven "...de las condiciones de Alem, pero con más nervio, con robustez cuyana,...[que] busca en una revuelta comida más sabrosa".<sup>6828</sup> Las divisiones entre estos diferentes grupos sólo podían salvarse con la candidatura a Gobernador del Senador Nacional Dr. José Vicente Zapata,<sup>6829</sup> pero como "...esta candidatura es imposible hoy, la discordia entre ellos renace otra vez".<sup>6830</sup> El Acuerdo no se realizó porqué, a juicio del Interventor Francisco Uriburu, los Mitristas

"...estaban más cerca de los Alemistas que de los segundos [Roquistas]; Ortega más lejos de los liberales que de los Guiñazuístas; y estos [los Guiñazuístas] hacían de francotiradores entre todos los partidos, a tanto por tiro".<sup>6831</sup>

Lo único viable para producir la transición política en Mendoza era según Uriburu, restablecer la política del Acuerdo entre los Roquistas y los Mitristas, cooptándose mediante incentivos, es decir "...agregándose [a] este acuerdo a los radicales mansos [reformistas]".<sup>6832</sup> La principal fuerza con que contaba la Intervención Uriburu en el seno de la misma oposición Radical era "...el miedo que le tienen a Lencinas".<sup>6833</sup> Ambos grupos, el de José Néstor Lencinas,<sup>6834</sup> y el del Diputado Nacional Agustín Videla Correas,<sup>6835</sup> se enrostraban mutuamente "...ser Roquistas y ambos están empeñados en probar lo contrario".<sup>6836</sup> El resultado de esta disputa entre Cívicos, sería según Ortega

"...la muerte del partido, en plena descomposición, que se traduce en los actos y actitud del gobierno, indeciso y vacilante pues siente el vacío bajo sus pies".<sup>6837</sup>

En los tres años que pasaron desde la revolución que derrocara al Gobernador Tiburcio Benegas (1889),<sup>6838</sup> Mendoza no había tenido, según Uriburu, "...sino un desgobierno sin ejemplo en la república. Hombres sin honestidad ni principios, picados, redomados y ladrones subieron a este gobierno para convertirlo en una pulpería de inmundicias".<sup>6839</sup> La Unión Cívica fue para Uriburu "...el resultado lógico de esta situación,...la protesta justa contra tanta inmoralidad e inmundicias".<sup>6840</sup> Más aún, Uriburu destacaba que la Unión Cívica representaba en Mendoza "...la inmensa mayoría de la provincia, cosa que no ha sucedido en ninguna otra parte".<sup>6841</sup> De la poca atención prestada

a este hecho por el gobierno central nacía quizá, para Uriburu, "...el error de creer posible el dominio de Ortega, como antes".<sup>6842</sup> Los amigos de Roca (Orteguistas y Guiñazuistas) que habían participado, ya sea directa o indirectamente, del desgobierno de estos tres últimos años, debían cargar con el desprestigio consiguiente:

"...Así, tiene Vd. al partido liberal, donde militaban nuestros mejores amigos, casi desmoronado y al amigo Ortega, antiguo y prestigioso caudillo, con buenas cualidades y grandes defectos, reducido casi a la impotencia, pues la mayor parte de sus viejos amigos, sus compañeros y hasta sus secretarios son hoy sus adversarios encarnizados".<sup>6843</sup>

De la antigua corte de Ortega,

"...no encontrará hoy mas que unos cuantos forasteros y muy pocos hombres de buen concepto. Sólo en dos Departamentos tiene su fuerza, pero esto no le alcanza para contarse seguro, pues aquel hombre de cuyo valor no es posible dudar, andaba a salto de mata, vulgarmente escondido porqué hasta las piedras se le revelaban".<sup>6844</sup>

De resultados de este desprestigio la conducta observada por los Guiñazuistas y los Liberales para con los Orteguistas distaba de ser cordial. Para Ortega, la actitud de los Liberales "...no ha sido ni medianamente correcta ni siquiera disculpable. Su política ha sido pura y simplemente de exclusiones para nosotros, pero con un carácter doblemente irritante para mis amigos porqué se prescindió siempre de nosotros".<sup>6845</sup> Según Ortega, los Liberales no los buscaban como colectividad "...sino que se trató siempre de absorvernos individualmente, provocando la anarquía del Partido y su disolución para incorporar después sus elementos a la fracción Liberal y suprimir de hecho nuestra personalidad política".<sup>6846</sup> En cuanto a la alianza de Oseas Guiñazú, y su círculo con la Unión Cívica, Ortega entendía que

"...lo capital en esta alianza inusitada es el factor o agente oculto que la ha preparado...Este agente ha sido el Dr. Barraquero, quien ha sido llamado de Buenos Aires, no para participar simplemente del gobierno, sino para trabajar hombres y cosas y producir la alianza de Guiñazú y los Cívicos, sirviendo así un plan premeditado contrario a nosotros".<sup>6847</sup>

Al cabo de algo más de dos años de un agitado gobierno, en octubre de 1891, Guiñazú renuncia al mando, y al influjo del Acuerdo firmado por Roca y Mitre, los legisladores Orteguistas, Civitistas, y Lencinistas nombran como Gobernador al Dr. Pedro N. Ortiz.<sup>6848</sup> Este último, que estuvo influido por Lencinas, se habría opuesto, tal como ocurrió en Tucumán, a la modificación de los avalúos de Patentes y Contribución Directa, lo cual a la postre determinó, en enero de 1892, su defenestración, y la Intervención Federal en la persona de Francisco Uriburu.<sup>6849</sup> A los antiguos grupos políticos constituidos por los Guiñazuistas, los Orteguistas, y los liberales y Mitristas, o sea Acuerdistas (antiguos Beneguistas, luego Civitistas), se sumaron a partir de entonces, los Lencinistas (léase Alemistas), y los Irigoyenistas encabezados por Ricardo Day.<sup>6850</sup> Sobre los Orteguistas, pesaba según el Interventor Francisco Uriburu, "...el descrédito de una larga dominación, no del todo correcta".<sup>6851</sup>

La situación no era del todo negativa para el Partido Autonomista Nacional, por cuanto la Unión Cívica se había dividido en dos facciones, "...de índole conservadora la

una y revolucionaria la otra".<sup>6852</sup> En cuanto a la Legislatura, constituida en su gran mayoría por Liberales, Guiñazuístas y Orteguistas, casi por iguales partes,

"...era compuesta de jente sin prestigio ni autoridad moral, salvo muy pocas y honorables excepciones. En su mayoría eran peones de Ortega y Guiñazú. El odio popular pesaba sobre ellos y con razón, pues en dos años esos legisladores se habían reunido dos veces: una para hacer Senador a Civit y otra para acusar a Ortiz".<sup>6853</sup>

Como el resultado de las elecciones convocadas para el 14 de febrero de 1892 era incierto y podía ser fatal, el Interventor Uriburu trataba "...de aproximar el mayor número posible de fracciones, garantiendo [premiando] siempre a los amigos".<sup>6854</sup> Esos amigos eran, en realidad, según el Secretario de Roca Mariano de Vedia, los Liberales. Aunque los Liberales y Orteguistas se odiaban cordialmente, los primeros

"...se inclinaban a una solución de paz y los segundos quieren para su uso exclusivo el gobierno, lo que francamente es imposible, porque no podrían tomarlo ni sostenerlo sin el apoyo de la Nación, apoyo que, por otra parte, ¿encontrarán una vez más?".<sup>6855</sup>

La política conciliadora iniciada por la Intervención Uriburu

"...cuando menos era útil para evitar que la Unión Cívica se uniere, lo que era el más grave peligro. Esa política ha sido eficaz, sino para encontrar un candidato de gobernador, para hacer más profunda la división de los radicales, pues Vd. ya sabrá que la más importante de esas fracciones, la de [Ricardo] Day, está unida con los Liberales, nuestros amigos, bajo la base de la candidatura de Deoclesio García...¿No es verdad que esto es más eficaz que el Gobierno de Ortega?".<sup>6856</sup>

Finalmente, los Guiñazuístas, cansados de buscar un arreglo con los Acuerdistas, proclamaron la candidatura de Deoclesio García Carrión,<sup>6857</sup> "...el menos liberal de todos los liberales y el menos Guiñazuísta indudablemente".<sup>6858</sup> El nuevo Gobernador Interino, Don Deoclesio García, pertenecía, según Olguín

"...a la trenza oligárquica de los Villanueva, Civit y Benegas, dueños de la tierra y de las industrias, que basaban su poderío político en la explotación de sus grandes fundos y bodegas".<sup>6859</sup>

Todos ellos, además de funcionarios, "...eran comerciantes e industriales, bodegueros de Mendoza y San Juan, a los cuales pertenecía el mismo Interventor Uriburu, que poseía grandes intereses en esta última provincia".<sup>6860</sup> Para Lisandro Labal,<sup>6861</sup> la solución encontrada por la Intervención Uriburu era una "...situación híbrida, mitad radical y mitad liberal".<sup>6862</sup> De esa situación había surgido como Diputado al Congreso Nacional un intelectual de fuste, autor de numerosos libros y ensayos, "...la persona del detractor y más rabioso difamador del Gral. Roca, desde hace dos años por la prensa: un Agustín Alvarez".<sup>6863</sup> De resultados de la Intervención Uriburu, el Partido Nacional había quedado, según Labal, "...fuera de escena,...y sus miembros perseguidos de una manera bárbara y salvaje, desconocida en este país".<sup>6864</sup>

Es sabido que como estrategias políticas constreñidoras operaron también las prácticas financieras y sucesorias. En Noviembre de 1890, cuatro meses después de

ocurrida la Revolución del 90, el ex-Gobernador Rufino Ortega le confesaba al General Roca, que

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno financiero. Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando hábilmente, quebrarlos allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de Aquiles estos señores".<sup>6865</sup>

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que

"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus intereses personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede llevar adonde se quiera".<sup>6866</sup>

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, desmontan a [Oseas] Guñazú y al gran diablo".<sup>6867</sup> Siete años más tarde, en 1897, el ex-Senador Nacional Emilio Civit le ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,<sup>6868</sup> hombre del Diputado Nacional Benito Villanueva,<sup>6869</sup> sea designado Gerente del Banco Nación en reemplazo de Elías Villanueva, pues es sabido que el fuerte de aquél "...ha sido siempre el torniquete bancario y la tropa de línea".<sup>6870</sup>

También el gobierno se inmiscuyó con estrategias políticas constreñidoras en el área educativa. El Gobernador Oseas Guñazú, le escribía al Presidente Juárez Celman que "...hace varios días que he escrito a Cárcano y al Dr. Villanueva indicándoles la necesidad de separar de sus puestos a los profesores Aguirre y Villars".<sup>6871</sup> A Guñazú le constaba que estos profesores "...instigaron a sus alumnos produciendo aquellos desórdenes de silvidos, pedradas, etc. sucedidos cuando llegó el Gobernador de Córdoba [Marcos Juárez]".<sup>6872</sup> Y según Emilio Civit,<sup>6873</sup> líder de los Liberales, Ortega hizo creer a Marcos Juárez "...que mi padre, Serú, y yo éramos los autores o instigadores de la silbatina de marra, obra espontánea de los muchachos del Colegio Nacional como muy bien le constaba".<sup>6874</sup> Asimismo, en 1891, el Gobernador Guñazú les puso a los Diputados Liberales (Mitristas) la condición de que "...el que lo sucediese a él debía ser siempre en todo de acuerdo con el Gral. Roca sin esto el no entraba en arreglo ninguno, hasi [sic] se hizo todo esto".<sup>6875</sup> A su vez, los Liberales le pidieron "...que se separase completamente de los Cívicos"; y Guñazú contestó "...que así lo hiva [sic] hacer, solo sí me dijo que no podía consentir que [el ex-Gobernador Rufino] Ortega se le echase encima porque así andaba este Sr. moviéndose en aquel tiempo".<sup>6876</sup>

#### **K-VI-b. El caso de San Juan.**

En San Juan --también perteneciente al subsistema político de Cuyo-- la primacía se la disputaban el Autonomismo Roquista y el Partido Constitucional. Meses antes de la Revolución del Parque, el Gobernador Alejandro Albarracín había designado con el aval de Juárez Celman como Ministro de Gobierno a su primo Belisario Albarracín y como Ministro de Hacienda a Hermógenes Ruiz.<sup>6877</sup> Con la caída de Juárez Celman, el Ministro de Gobierno fue sustituido por el Dr. Ricardo T. Ruiz, y el Ministro de Hacienda por Manuel José Godoy. Con la transferencia del mando de Pellegrini a Luis Sáenz Peña, en Octubre de 1892, a Ricardo Ruiz le sucede el Dr. Guillermo Aubone, y a Godoy le sucede

el Ing. David Chávez, para finalmente, luego de la revolución Radical de 1893, quedar la situación en manos de Domingo Morón.<sup>6878</sup>

La administración de Albarracín --que era el antecesor y el que engendró el gobierno de Morón-- había insumido a juicio de *La Prensa*, "...todos los recursos de aquella Provincia en el mantenimiento de fuerzas militares y policía secreta".<sup>6879</sup> Como los recursos de la provincia no habían bastado para estos gastos, "...se emitió por Albarracín con tal objeto, \$300.000 en letras de tesorería, y no hace mucho que la Legislatura ha autorizado a Morón a emitir un millón de las mismas letras de tesorería".<sup>6880</sup>

#### **K-VII.- Las secuelas de la corrupción bancaria. El caso de San Luis.**

En San Luis --correspondiente al subconjunto político de Cuyo-- la supremacía política también la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo. Mauricio Orellano Jofré,<sup>6881</sup> designado Gobernador titular en abril de 1888, al igual que la mayoría de los Gobernadores pudo sortear el vendaval producido por la Revolución de Julio, para finalmente entregar el poder en 1891 a Jacinto Videla.<sup>6882</sup>

Como resultado de la corrupción en el manejo del Banco, y el nepotismo vigente durante los gobiernos de Eriberto Mendoza y Jacinto Videla, se alimentó un clima revolucionario semejante al acontecido más de veinte años atrás en Entre Ríos y a fines de la década del 70 en Corrientes. Un Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para inspeccionar la conducta del Gerente de la sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros del banco y se encontró con que el candidato [a reemplazar al gerente] era el mayor deudor y el único que no servía sus débitos".<sup>6883</sup> Los gobiernos se aprovechaban también de la ignorancia de los votantes. En 1892, la Junta Electoral informó "...que donde había periódicos se ha hecho la publicación [de los registros], y, que donde no los había, han estado los registros en los juzgados de paz, a disposición de todo el mundo".<sup>6884</sup> Sin embargo, el Diputado Nacional Pascual Beracochea, un íntimo amigo de Leandro Alem, sostenía que esto no era lo que marcaba la ley, pues

"...la ley dice que donde no haya periódico los registros sean publicados por medio de carteles, y la Junta no se ha atrevido, a pesar de toda la parcialidad que revela ese documento, a decir que se hubiera publicado carteles".<sup>6885</sup>

Este clima revolucionario se expresó en dos oportunidades. En una primera ocasión, ocurrida en 1893, la disolución del piquete de caballería estacionado en San Luis permitió el inmediato alzamiento popular, encabezado por Teófilo Sáa,<sup>6886</sup> el cual derrocó y encarceló a su medio primo hermano, el Gobernador del fraude Jacinto Videla, cuya Legislatura estaba integrada por un gran número de miembros de su propia familia.<sup>6887</sup> Intervenida la provincia, el Gobierno Federal designó como Interventor al Coronel Daniel Donovan,<sup>6888</sup> para luego convocar a elecciones de legisladores. Constituida la Legislatura el primero de enero de 1894, el 4 del mismo mes el Colegio Electoral designó Gobernador a Lindor L. Quiroga, de pasado Mitrista.<sup>6889</sup>

Una vez en posesión de la gobernación, Quiroga cometió "...la inconsecuencia de no seguir los acuerdos de los amigos Mitristas, que más habíanle ayudado en su cruzada, lo cual motivó el que hoy se separaran de su círculo".<sup>6890</sup> La falta de cuadros en el partido oficial "...dio por resultado la fusión con el partido radical, con perjuicio del Mendocista o

sea nacional, que se presentó solo en la lucha y que dio por resultado la elección de los actuales Diputados al Congreso: Daract, Lobos y Olivero".<sup>6891</sup> La renovación de la tercera parte de la Legislatura, que debía hacerse conjuntamente con los Radicales, fracasó por haber querido Quiroga y sus partidarios "...seleccionar entre el Partido Radical las personas que debían representarle, absteniéndose los radicales de acudir a los comicios, formándose la legislatura con mayoría Mitrista".<sup>6892</sup>

En esta elección de diputados, a juzgar por el Senador Nacional Eriberto Mendoza,<sup>6893</sup> tal era la violencia existente, que ni confeccionando el propio Gobernador Quiroga la lista pueden hacerse de elementos propios, pues

"...las elecciones las ganan a balazos y asimismo quien sabe, pues si vamos a la lucha, como casi es seguro que suceda aceptaremos la contienda en el terreno que la coloquen".<sup>6894</sup>

Finalmente, Quiroga declaró candidato de sus simpatías al Jefe de Policía Pedro Regalado Lucero. Pero la sola indicación de ese candidato "...motivó el desacuerdo y rompimiento entre los amigos que habíanlo acompañado durante la época de su gobierno".<sup>6895</sup> Al ver Quiroga el mal efecto producido por esa designación "...cambió de opinión, sustituyendo a Regalado por Ardiles, pero esta solución propuesta por Quiroga produjo la completa escisión entre las filas Mitristas y nacionalistas".<sup>6896</sup>

Fue en esas circunstancias, que la Legislatura designó como Gobernador Interino a Monitor Maza, quien a su vez designó como Ministro General a Abelardo Figueroa, como Jefe de Policía al Dr. Ramón Barbeito, como Jefe Político del Departamento de Mercedes a Valentín Romero y como Jefe Político del Departamento de Ayacucho al Dr. Julio Daract Barbeito.<sup>6897</sup> Frente al doble gobierno, Quiroga optó por la represión, derrotando a Maza y sus partidarios en un corto combate registrado en Quines, del que resultaron detenidos Maza, Figueroa y 37 de sus seguidores.<sup>6898</sup> Más luego, Daract fue muerto en prisión.<sup>6899</sup> Para amortiguar el impacto del crimen, el oficialismo se empeñó "...en sostener que Daract fue muerto en combate".<sup>6900</sup> Sin embargo, se confirmaron "...los más monstruosos detalles del asesinato. Daract fue fusilado en cepo de lazo, no conservando forma humana por tantas puñaladas y balazos recibidos".<sup>6901</sup> Esta crítica situación no alcanzó a sostenerse, pues inmediatamente se declaró otra intervención en la persona de Norberto Piñero.<sup>6902</sup> Pero pese a la intervención de Piñero, la naturaleza oligárquica del gobierno puntano se perpetuó nuevamente con los gobiernos de Adeodato Berrondo, Narciso Gutiérrez y Jerónimo Mendoza, quienes respondían a la influencia de Pellegrini, hasta ocurrir los hechos revolucionarios de 1904.

## **K-VIII La incidencia del cisma geográfico. El caso de Santa Fé.**

En Santa Fé --provincia perteneciente al subsistema político del Litoral-- producida la Revolución del 90, el Gobernador Juan M. Cafferata, al igual que la casi totalidad de los gobernadores, pudo perpetuarse en el mandato. Sin embargo, debido a desinteligencias con el Jefe de Policía, defendido por Cafferata, el Ministro de Gobierno Dr. Néstor Iriondo renunció al cargo el 20 de Agosto.<sup>6903</sup> Cuatro días más tarde, el Partido Autonomista Nacional sufre su primer sangría, pues "...no obstante las mil protestas de adhesión [al oficialismo], los Iriondo se han declarado ayer opositores al Gobierno y desligados de nuestro Partido, formando otro bajo la denominación de Partido Iriondista".<sup>6904</sup> Simulando

ignorar si los Iriondistas eran o no Cívicos, Gálvez le informaba a Roca que "...su separación [la de los Iriondistas] no afecta ni la existencia del Gobierno ni la cohesión del Partido".<sup>6905</sup> Lejos de ello, Gálvez le aseguraba a Roca que "...aquí es público el regocijo".<sup>6906</sup> La provincia de Santa Fé también había entrado en una larga crisis política, por cuanto el clan de los Rodríguez del Fresno, que la había gobernado por décadas, había caído en una cruel lucha intestina, de raíz económica, cuyos embates se hicieron sentir incluso a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país.<sup>6907</sup>

Si bien la elite santafesina se encontraba inmersa en los más vehementes vínculos cruzados de todo el país debido a la intensa inmigración europea,<sup>6908</sup> se hallaba también fracturada, como la provincia de Entre Ríos, por la predominante incidencia de un factor pre-moderno: el territorio o la geografía --que no padecían otras provincias como Tucumán o Córdoba-- en desmedro de otras fracturas puramente modernas.<sup>6909</sup> La fractura geográfica se manifestaba entre las localidades sufragáneas a la ciudad de Santa Fé, donde existía un fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras localidades identificadas con la ciudad de Rosario, donde el Mitrismo había sentado en el pasado reciente sus reales y donde ahora se daba una sólida presencia Radical. En octubre de 1893, el Coronel Aniceto Latorre le contaba a Gregorio Torres,<sup>6910</sup> íntimo amigo de Roca, que el Partido Radical tenía arraigo en el Rosario "...por que la gente está desesperada por las espoliaciones que se les hace, [y] que no hay negocio que no sea de la familia imperante [Gálvez]".<sup>6911</sup> Finalmente, en 1893, a semejanza de lo ocurrido más de veinte años atrás en Entre Ríos y en 1878 en Corrientes, la insurrección popular santafesina encabezada por Mariano N. Candiotti,<sup>6912</sup> con nutrida participación de inmigrantes,<sup>6913</sup> derrocó a Cafferata, cuestionando los gobiernos precedentes de Zavalla y Gálvez, por ser prolongación del Unicato Iriondista, y provocó la tercera intervención de la provincia.<sup>6914</sup> Pero a diferencia de las intervenciones anteriores a la Revolución del 90, las últimas eran intervenciones ampliadas, es decir abarcaban los tres poderes.<sup>6915</sup> En cuanto a los mecanismos nepóticos, éstos aún subsistían cuando entró a gobernar Cafferata. En la Convención Provincial del Partido Autonomista Nacional, el ex-Senador Provincial Juan Terrosa le informaba a Roca, que los primeros Delegados nombrados por algunos Departamentos de la Provincia "...son los hermanos, cuñados, y parientes de Gálvez".<sup>6916</sup> Esto, además de risueño, "...tiene de malo que muchos ciudadanos de importancia social que pudieran prestarnos su apoyo, se retiran pues no les agrada ir atados, al egoísmo, por causas irritantes de un sólo hombre".<sup>6917</sup>

## **K-IX Las rebeliones liberales.**

### **K-IX-a El caso de Corrientes.**

También en Corrientes, provincia correspondiente al subconjunto político del Litoral, y cuya supremacía la seguían disputando el Autonomismo y el Liberalismo, se experimentaban las lacras del nepotismo y la sedición.<sup>6918</sup> Al Gobernador Autonomista Juan Ramón Vidal, (a) "Rubichá",<sup>6919</sup> le sucedió en Diciembre de 1889 su primo hermano y Jefe de Policía Antonio I. Ruiz.<sup>6920</sup> Los sucesos revolucionarios acontecidos en Buenos Aires en Julio de 1890, al igual que en la mayoría de las gobernaciones, no intercedieron en la continuidad del mando. Pero dos años más tarde, en Diciembre de 1892, estalló una revolución liberal a la que el Gobernador Autonomista Antonio I. Ruiz hizo frente con

relativo éxito.<sup>6921</sup> Al año siguiente, en Agosto de 1893, estalló otro movimiento revolucionario liberal, que se extendió a toda la provincia, comenzando en Saladas y continuando en Empedrado, Esquina, Goya y Bella Vista, y culminando con la toma de la Capital.<sup>6922</sup> La intervención del Dr. Leopoldo Basavilvaso,<sup>6923</sup> puso fin a la rebelión, convocó a elecciones y colocó en funciones a los electos por el Colegio Electoral: los liberales Valentín Virasoro y Daniel Artaza.<sup>6924</sup> Y otros dos años más tarde, en Julio de 1895, el gobierno de Valentín Virasoro,<sup>6925</sup> fue atacado en la misma ciudad capital por insurrectos Autonomistas encabezados por el Oriental José Núñez.<sup>6926</sup>

#### **K-IX-b. El caso de Entre Ríos.**

Y finalmente, en Entre Ríos --provincia perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo-- si bien subsistían los gobiernos nepóticos, íntimamente ligados a la elite Santafesina, también se daba una profunda resistencia popular. Cinco días antes de la Revolución del Parque (26-VII-1890), Antonio Fragueiro le escribía a Roca que la oposición al Presidente Juárez Celman y al Gobernador Sabá Z. Hernández,<sup>6927</sup> "...se multiplica por horas, hay públicamente en las calles, clubs, cafés y en todas partes nacionales, extranjeros, gritan abajo, abajo, lo he oído y presenciado".<sup>6928</sup> El Gobierno de Entre Ríos, desde la noche del 20 de Julio de 1890 "...vuelve a los acuartelamientos, cantones y reuniones de fuerzas, y hay quien asegura que llegado un momento [las tropas] no responderán al Gobierno, la desconfianza es inmensa".<sup>6929</sup> Sin embargo, Hernández al igual que la mayoría de los Gobernadores pudo resistir el embate. Y ocho años más tarde, en 1898, gobernando Salvador Maciá,<sup>6930</sup> la política Entrerriana parecía, "...que tiende resueltamente a solucionarse por medios pacíficos".<sup>6931</sup> C. M. Zavalla quería imponerle a Roca que en esos momentos a toda persona sensata se le ocurría "...que sería un acto verdaderamente temerario el de pretender imponerse por una lucha armada".<sup>6932</sup> Sin embargo, Zavalla se equivocaba, pues en todo el mes marzo del año del siglo, se desató una tremenda revuelta armada.<sup>6933</sup>

A modo de conclusión, podemos confirmar que en una primer etapa que arrancó con Caseros (1852) y concluyó con Pavón (1862); y en la segunda fase que se inició con Pavón y se interrumpió con San Jacinto y Pozo de Vargas (1867), pasando por una tercer etapa que se inició con estas dos últimas batallas y culminó con La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente mediante la transición pacífica (fraude electoral, negociación inter-notabiliar o reivindicaciones religiosas). En un cuarto y último período de la llamada Organización Nacional, que comenzó con La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), prevaleció la política de la Conciliación (1877). Dentro del período en que gobernó la Generación del 80, en su primera y segunda etapas, que nacieron con el episodio del Congreso de Belgrano (1880) y concluyeron con la Revolución del 90, los conflictos provinciales también se dirimieron principalmente a través de la ruptura violenta (golpes de estado y levas de contingentes), y secundariamente a través de la transición pacífica (fraude electoral, negociación inter-notabiliar y reivindicación eclesiástica). Y en una tercera fase, que se inició con la Revolución del Parque (1890) y concluyó con el inicio de la segunda presidencia de Roca (1898), los conflictos en el Oeste y el Noroeste se volvieron a dirimir, con excepción de Córdoba, Mendoza y San Juan, intermitentemente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente a través de la transición pacífica (sufragio y negociación inter-

notabiliar). Las dos últimas etapas de la Generación del 80 se correlacionaron negativamente con el inicio de la fase de crecimiento de la tercera onda larga de Kondratiev (1893/96-1914/20). En estas dos etapas, la amenaza de ruptura político-social que la abstención revolucionaria del Radicalismo significó fue neutralizada mediante prácticas concurrencistas denominadas políticas de las paralelas y un compromiso de naturaleza legislativa (Ley Sáenz Peña).

### **Epílogo Sección III-C**

En esta sección, donde analizamos las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico, encontramos que en la etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrisismo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del Mitrisismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891.

Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de veto presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la propia Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fé, nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación casi total de los conflictos inter e intraregionales",<sup>6934</sup> no puede ser sustentada.

Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;<sup>6935</sup> que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser

consolidadas;<sup>6936</sup> y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales.

Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones constituyentes),<sup>6937</sup> el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),<sup>6938</sup> la justicia (jueces federales),<sup>6939</sup> la información periodística (corresponsales de la prensa porteña),<sup>6940</sup> las comunicaciones postales y telegráficas;<sup>6941</sup> los clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).<sup>6942</sup>

### **Sección III-D      Disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación de un orden notabiliar o elitista**

A mayor grado de disputas, rupturas y quebrantos en el seno de las elites de una sociedad determinada menor es la capacidad institucional para gobernar y menor el grado de legitimidad del régimen político imperante.

Habiendo en la sección anterior tratado las conciliaciones, pactos y treguas en la gestación de un orden oligárquico, en la quinta sección nos dedicaremos a investigar las rupturas y quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista, que desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: las crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista, la transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-1874), la debacle de la elite Nacional-Mitrista y origen de la oligarquía Autonomista (1874-1876), la conflictividad interna versus externa en la cuestión santiagueña (1881-86), y la competitividad inter-oligárquica (1884-86).

#### **Capítulo III-D-12**

##### **Crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista (1808-1820)**

Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como conflictos o prácticas clánicas, étnicas y corporativas para defender intereses de familia --a juicio de Mary Lowenthal Felstiner, quien trata innovadoramente el caso chileno-- terminó por envolver a los patricios o criollos en serias disputas, primero con los subdelegados y gobernadores-intendentes impuestos por el orden imperial-absolutista español, y luego con las nuevas autoridades impuestas por las autoridades del orden nacional-republicano.<sup>6943</sup> El desigual crecimiento del movimiento independentista, y con él la propia crisis del orden imperial, fue atribuido ya en ese entonces a las reacciones generadas por las crónicas disputas clánicas.<sup>6944</sup> De las variantes de solidaridad, alianza, bloque histórico o coalición existentes, que desbordaba la conocida solidaridad étnica entre americanos de una misma

provincia o región, las más elementales eran aquellas surgidas de la solidaridad o cohesión de los linajes familiares, las cuales dieron lugar a un peculiar sistema de patronazgo o clientela, vulgarmente denominado oligarquía, donde las relaciones de parentesco eran las predominantes. Natalio Botana, tomando prestado seguramente de Ossorio y Florit,<sup>6945</sup> le asigna a los mecanismos sociológicos o antropológicos del parentesco, vigentes en el estado oligárquico, el carácter de supervivencias o “sedimentos persistentes de la tradición señorial”.<sup>6946</sup> Pero para Bourricaud (1966), en los clanes oligárquicos no todos los miembros de una familia son iguales en riqueza, prestigio o poder, pues siempre están los “parientes pobres” y los “advenedizos” de por medio; cada familia tiene su cabeza, la cual tiene un poder muy extenso derivado de los principios del abolengo, la primogenitura, la varonía y la práctica de compensar las dotes casando hermanos con hermanos, o del acuerdo explícito entre hermanos, primos, cuñados y yernos, a favor del más activo o competente.<sup>6947</sup>

El interés de preservar un espacio de poder propio —la casa— libre de la intromisión de la elite burocrática central, habría condicionado entonces a los patriciados o clanes familiares a reforzar sus características patricéntricas. Por el término “casa” se conocía en tiempos coloniales al compuesto de familia, hogar, tierra, apellido y antepasados.<sup>6948</sup> Tomando prestado de Bourricaud y Rory Millar, la idea de que la intensa fronda o rivalidad que se dio a fines del siglo XVIII entre los diversos clanes oligárquicos que se disputaban en las ciudades de provincia las posiciones capitulares obedecía al afán de dichos clanes por colocar parientes, amigos o aliados en el aparato del estado, en los cuales poder a su vez conseguir empleo o cargos para su numerosa clientela de parientes y amigos.<sup>6949</sup> Sin embargo, en opinión de Fals Borda (1970-71), los conflictos intra-oligárquicos fueron alimentados por rivalidades ideológicas y generacionales. Por ello, a la noción de elite, Fals Borda antepone el concepto de contra-elite, acuñado inicialmente por Lasswell (1965) y Johnson (1966).

Las contra-elites ideológicas, a diferencia de las puramente generacionales, inician la creación y difusión de contravalores del orden social establecido, sirven como grupo de referencia a otras colectividades, y desafían a los grupos dominantes desde dentro usando sus propias herramientas.<sup>6950</sup> Según Barman y Barman (1976), en su estudio sobre el Brasil imperial, los conflictos y las denuncias de oligarquía y “filhotismo” fueron alimentados, no por razones ideológicas o generacionales, sino por el incremento en la producción de graduados universitarios, que superó el número de posiciones de elite disponibles, a la par que la perpetuidad en las posiciones de poder por parte del grupo dominante original bloqueaba toda posibilidad de ascenso. A propósito de la tesis que atribuye el origen de la revolución de independencia a las luchas clánicas, Wolf y Hansen (1967) y Trindade (1986), sostienen que la solidaridad política entre la docena de patriciados provinciales del interior argentino, que llevó a la independencia del colonialismo español “...fue fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos políticos internos y los intereses económicos contradictorios”.<sup>6951</sup>

### Capítulo III-D-13. **Transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-1874).**

#### Índice

- M-I Lucha política entre Procónsules militares
- M-II. Lucha política y perpetuación de la elite

### Introducción del capítulo III-D-13.

Autores como Palcos (1963), Auza (1971), Rafael (1982) y Hardoy (1993), intentaron analizar la participación directa del Ejército en los conflictos provinciales. Se preguntan estos autores qué estabilidad política podía sustentar a las provincias, si las Comandancias Militares, para rechazar la oposición anti-sistema (extra-republicana) y asegurar el orden intervenían las Provincias en forma directa y ya no sólo en forma disuasoria.

Con el triunfo militar sobre la oposición anti-sistema (extra-republicana), conocida bajo la denominación de Montonera (San Jacinto y Pozo de Vargas),<sup>6952</sup> pendía aún el resultado final de la guerra, la de la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).<sup>6953</sup> Pero con las disputas por la sucesión presidencial de Mitre (1868) y los viejos agravios aún no cicatrizados, se enfrentaron entre sí ya no caudillos militarizados y sí Jefes militares propiamente dichos. En efecto, los Jefes de las Divisiones Militares del Oeste y del Norte, Generales José Miguel Arredondo y Antonino Taboada respectivamente, se hallaban frontalmente enemistados. Arredondo, (a) "El General Elector", un símil del Gral. Wenceslao Paunero pero afin a la candidatura de Sarmiento, y cuyas tácticas represivas fueron copiadas del General Francés Bugeaud, atacaba a Taboada, partidario de la candidatura de Rufino de Elizalde, acusándolo de despotismo.<sup>6954</sup> Y Taboada acusaba a Arredondo de estar en combinación con el Cura José M. del Campo en Tucumán y con Moisés Omill en Catamarca, aparentemente partidarios de Sarmiento.<sup>6955</sup>

El ejército de este período (a quien Sarmiento en opinión de Hardoy debía la presidencia), a diferencia del correspondiente a la era Mitrista, consistía en Cuerpos de Ejército puestos bajo el mando de una suerte de Procónsules --las antípodas de los caudillos-- que aseguraban el orden mientras se producían los cambios de autoridades.<sup>6956</sup> La doctrina que el gobierno nacional sostenía a fines del gobierno de Mitre era que los Comisionados Nacionales "...tenían derecho de nombrar los gobernadores".<sup>6957</sup>

El desajuste o desequilibrio político y económico alcanzó a los cuatro subsistemas políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) del espacio interior argentino, y sometió su hegemonía política ya no a fracturas pre-modernas (genéticas y geográficas) sino a específicas fracturas modernas (ideológicas, políticas y económicas expresadas en crisis económicas y candidaturas presidenciales), cuyos voceros fueron los respectivos Comandantes Militares. La crisis económico-financiera de 1866 generó una intensa escasez de circulante en todo el espacio nacional, al extremo de tener que recurrir para el mercado interno a las monedas conocidas como Melgarejos, que eran acuñadas en Bolivia.<sup>6958</sup> Por un lado, el periódico *El Cosmopolita* (Rosario) sostenía que la irrupción masiva de la cada vez más envilecida moneda Boliviana, conocida como moneda feble, podía ser combatida sólo con la emisión de moneda fuerte.<sup>6959</sup> Y por otro lado, el mismo periódico, delataba que los más afectados por la oscilaciones de la moneda feble Boliviana fueron los artesanos, quienes sufrieron dicho impacto en el valor de su trabajo, es decir en sus jornales.<sup>6960</sup> Asimismo, Olivera (1868) puntualizaba que desde 1864, el monto de circulante existente había comenzado a volverse escaso. Debido al enorme incremento de la producción, Olivera agregaba, las consecuencias de esta escasez fueron mayores, un

índice de los cuales era la alta tasa de interés del 18% al 24% anual cargados al crédito en 1866.<sup>6961</sup>

Estas crisis fueron el material que alimentó el examen histórico acerca de los golpes de estado y los crímenes políticos ocurridos en este período y que nos llevó a aplicar las tesis de Parsons (1968) y Baldwin (1971) acerca de la transferencia de los conceptos de inflación y deflación de la teoría del dinero a la teoría del poder y las comunicaciones, y que nos llevó asimismo a formularnos una serie de reflexiones. Los crímenes políticos sucedidos en San Juan antes de Pavón (Benavidez, Virasoro y Aberastain), en Córdoba luego de Pavón (Posse) y el cruento fin de la Segunda Guerra de la Triple Alianza (muerte del Mariscal López), habrían constituido los signos premonitorios del desencadenamiento de la crisis Entrerriana y la venganza final recaída en el Gral. Urquiza. La fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/1875)?, habría desequilibrado la balanza del poder en la Cuenca del Plata y dado origen a la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70).<sup>6962</sup> Las rebeliones Jordanistas de 1870, 1873 y 1876, y las rebeliones del Chacho y de Varela en el Noroeste habrían constituido una secuela necesaria de la Guerra de la Triple Alianza.

### **M-I La lucha política entre Procónsules militares.**

De resultados de esta crisis, de 1866 a 1867 el Río de la Plata habría experimentado nuevamente una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, que se confundía con la disputa por la sucesión presidencial, donde se dirimían candidaturas continuistas (Elizalde) y anti-continuistas (Sarmiento). La hegemonía política de la ciudad de Córdoba, perteneciente al subsistema político del Centro, sede de la División del Oeste comandada por el Gral. Arredondo, partidario de la candidatura de Sarmiento, era disputada tanto por la ciudad de Concepción del Uruguay, sede oficial del Gobernador Urquiza, como por la misma Buenos Aires.

Con motivo de las diferencias que habían dividido al Partido Liberal de Córdoba, y provocado la deposición del Gobernador Roque Ferreyra;<sup>6963</sup> en Julio de 1866, había triunfado electoralmente el Partido Constitucionalista o Federal,<sup>6964</sup> en la persona de Mateo Luque.<sup>6965</sup> En agosto de 1867, gobernando Luque, se produjo una sublevación popular encabezada por el Sargento Simón Luengo,<sup>6966</sup> el mismo que años antes había destituido al Gobernador Justiniano Posse, quien esta vez detuvo al Gobernador Delegado Carlos Roca,<sup>6967</sup> y al Ministro de Guerra Julián Martínez, incurriendo este último en la inconducta de concertar con el rebelde.<sup>6968</sup> Luque fue restituido con ayuda de su pariente político, el Gobernador Santafesino Nicasio Oroño, esta vez apoyando la candidatura presidencial de Urquiza, y por la acción del Gral. Emilio Conesa.<sup>6969</sup> Pero finalmente Luque fue obligado a renunciar por la acción de los políticos liberales coaligados con Buenos Aires, que dudaban de su lealtad debido a la respuesta dubitativa que había brindado al Vice-Presidente Marcos Paz cuando este le solicitó auxilio para sofocar la revuelta.<sup>6970</sup> Pero como la Legislatura de Córdoba demorara la aceptación de la renuncia de Luque, el Gral. Arredondo la disolvió, delegando el mando en Félix de la Peña.<sup>6971</sup>

En Mendoza, correspondiente al subconjunto político de Cuyo, y donde la supremacía política era disputada por Córdoba y por Buenos Aires, la crisis llegó, por motivos semejantes a los ocurridos previamente en Córdoba. El Coronel Juan de Dios Videla Corvalán,<sup>6972</sup> de antecedentes políticos federales, y el Coronel Carlos Juan Rodríguez,<sup>6973</sup> irrumpieron el 9 de noviembre de 1866 en el escenario político cuyano con

un movimiento anti-sistema, la Revolución de los Colorados, surgida de un motín de presos.<sup>6974</sup> En su estallido estuvieron presentes elementos del clero cuyano.<sup>6975</sup> Otro año después, en 1867, el Vicario Capitular Rizzerio Molina fue encarcelado y el Gobernador Nicolás Villanueva excomulgado.<sup>6976</sup> En la Revolución de los Colorados, se lanzó una proclama revolucionaria, donde amén de cuestionar la Guerra entablada con el Paraguay los alzados en armas sostenían, para justificar su actitud rebelde, que en Mendoza reinaba un crudo nepotismo, es decir una variante de la oligarquía, "...que no es forma democrática sino monárquica".<sup>6977</sup>

El predominio político de San Juan, perteneciente al subsistema político de Cuyo, era disputado tanto por Santiago del Estero, sede del Jefe de la División del Norte Gral. Antonino Taboada, partidario de la candidatura de Rufino de Elizalde; como por Córdoba, sede de la División del Oeste comandada por el Gral. Arredondo, partidario de Sarmiento. Como resultado de la derrota militar infligida el 5 de Enero de 1867, en la Tercera Rinconada del Pocito,<sup>6978</sup> por el Cnel. Videla en la persona del Coronel Julio Campos, el mando de San Juan pasó de manos de Camilo Rojo,<sup>6979</sup> al de José Bernardo Molina.<sup>6980</sup> Más luego, como consecuencia del triunfo militar del General Arredondo sobre los Colorados, ocurrido en 1867 en la batalla de San Ignacio, el Gobernador Delegado en San Juan, José Bernardo Molina, cayó ajusticiado, asumiendo el interinato Ruperto Godoy,<sup>6981</sup> quien convocó a elecciones consagrando Gobernador a su primo hermano José M. del Carril.<sup>6982</sup>

Y en Catamarca --perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya hegemonía política se la rivalizaban también Santiago del Estero y Córdoba-- una revolución anti-sistema, dirigida por el Cnel. Melitón Córdoba, con base en los Departamentos del Oeste (Andalgalá, Belén y Santa María) y en connivencia con los departamentos de El Alto y Ancastí, derrocó el 2 de Julio de 1866 al Gobierno del Comandante Víctor Maubecín.<sup>6983</sup> Este último habría batido a los rebeldes, pero éstos apresaron al Gobernador Delegado Miguel Molina,<sup>6984</sup> al Presidente de la Corte Carlos Tagle y a los hermanos Eufemio y Severo Maubecín, y los colocaron "...en un improvisado patíbulo frente a un piquete para fusilarlos en caso de que el Gobierno no se rindiese".<sup>6985</sup> Ante tan dramática extorsión sus parientes le suplicaron depusiese las armas para salvar a los rehenes, a lo que accedió desterrándose a Santiago del Estero, lugar desde donde solicitó la intervención federal.<sup>6986</sup> Como Comisionado se envió al Senador por Jujuy Plácido Sánchez de Bustamante, quien tras declarar acéfala la provincia, designó al Pbro. Victoriano Tolosa como Gobernador Provisorio.<sup>6987</sup> Pero una reunión de la Legislatura, protegida por el Gral. Arredondo,

"...desconoció lo hecho por Bustamante, alegando haber este declarado en acefalía la provincia cuando existía su Legislatura; y en consecuencia reasumiendo sus derechos nombró a Jesús María Espeche de Gobernador".<sup>6988</sup>

Más luego, un nuevo movimiento revolucionario, esta vez bajo la inspiración del Jefe de la División del Norte Gral. Taboada, depuso a Jesús María Espeche y renombró a Tolosa, "...reponiendo las cosas al estado de la intervención".<sup>6989</sup> Posteriormente, meses después de producida en Mendoza la Revolución de los Colorados, y derrotada la misma en los combates de San Ignacio y Pozo de Vargas, el 31 de Abril de 1867 Moisés Omill se sublevó en Catamarca contra las autoridades nacionales y el 7 de Mayo delegó el mando en Tolosa.<sup>6990</sup> Pero al mes siguiente, el 14 de Junio de 1867, Taboada coaligado con el Coronel Octaviano Navarro,<sup>6991</sup> ordenó ocupar la plaza de Catamarca para reponer a Jesús

Espeche y detener a Tolosa y su Secretario José Espeche, remitiéndolos a disposición del Juez Federal con asiento en Santiago del Estero.<sup>6992</sup> Según el Ministro del Interior Dr. Guillermo Rawson,<sup>6993</sup> la provincia de Catamarca estaba

"...sufriendo un verdadero martirio; no hay memoria bastante para contener el número de revueltas que ha habido. Es una provincia que tiene 70.000 habitantes, que son industriosas por la misma naturaleza de su suelo; tienen instrucción porque hay allí un Colegio donde han recibido educación muchos hombres, y debía esperarse que hubieran hombres patriotas, inteligentes y probos, ya que no otra cosa; que se desarrollaran allí los progresos de la civilización".<sup>6994</sup>

Sin embargo, pese a estas virtudes, Catamarca estaba según el Ministro Rawson agitada desde 1862, año de la batalla de Pavón, es decir desde hacía cinco largos años, por constantes revueltas cuya causa no las podía atribuir "...a las masas inertes que no tienen opinión propia", pero sugería sí la responsabilidad de sus elites.<sup>6995</sup>

Y en Entre Ríos, concerniente al subconjunto político del Litoral, la hegemonía política estaba supeditada al dominio de Urquiza, con sede en Concepción del Uruguay, quien no desesperaba de un nuevo turno presidencial. Sin embargo, asomaban atisbos de rebeldía en la prensa política, únicos agentes movilizadores de la opinión entonces existentes, en especial en Gualaguaychú, donde El Litoral, dirigido por Evaristo Carriego, y La Democracia polemizaban permanentemente con El Pueblo, de Paraná, periódico federal neto, "...teniendo la osadía de hacer oposición a su Capitán General [Urquiza]".<sup>6996</sup> No obstante ello, el entonces Presidente Sarmiento se reconcilió con Urquiza abonando el gesto con una célebre visita.<sup>6997</sup> En un largo artículo de Carriego, que lleva por título "La Reelección es un crimen", concluye admonitoriamente:

"...si quiere que la unión se conserve en esta provincia, que ella no sea el teatro de una anarquía sangrienta, que los Entrerrianos no tengan después de 'veintidos' años que echarle en cara también esta última calamidad, la mayor de todas, que estamos previendo, deje el mando, concluido su período legal, dé él primero el ejemplo de su respeto a la Constitución que el país ha jurado y no estorbe al pueblo la elección que debe hacer de la persona que ha de sucederle en el gobierno".<sup>6998</sup>

En el transcurso de 1868, envuelta Corrientes en las disputas por la candidatura presidencial, las tropas acantonadas en Paraguay al mando del Jefe de la Guardia Nacional Coronel Wenceslao Martínez,<sup>6999</sup> partidarias de la candidatura presidencial de Sarmiento, y apoyadas por un grupo de oficiales liderados por el Cap. Plácido Martínez,<sup>7000</sup> desalojaron del poder a Evaristo López, partidario de la candidatura de Urquiza.<sup>7001</sup> Esta maniobra, que fue repudiada en el Congreso Nacional por el Senador Wenceslao Díaz Colodrero,<sup>7002</sup> contaba con frondosos precedentes en el resto del país que hacían recordar la tradicional ingerencia de los oficiales del ejército en la política provincial.<sup>7003</sup> Llevada la lucha al terreno militar, el Coronel Nicanor Cáceres (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado), había logrado batir a los liberales al sur de Corrientes, en las cuchillas de Garay. La oportuna intervención de fuerzas nacionales al mando del Gral. Emilio Mitre decidieron la suerte de las armas a favor del Gobernador Interino Victorio Torrent,<sup>7004</sup> elegido por la Legislatura, pero no alcanzó para constituir a tiempo el Colegio Electoral.<sup>7005</sup>

Pero las ambiciones políticas fragmentaron al Liberalismo correntino en tres fracciones, cada una de las cuales contaba con su propio candidato a Gobernador: el Dr.

Juan Eusebio Torrent,<sup>7006</sup> el Cnel. Celestino Araujo y el Comandante Santiago Baibiene, el más luego héroe de Ñaembé.<sup>7007</sup> Celebrada una transacción resultó Gobernador el Juez Federal José Miguel Guastavino y Vice-Gobernador Baibiene.<sup>7008</sup> Pero a raíz de un conflicto entre la Legislatura y el Ejecutivo, Guastavino renunció cediendo su lugar al Vice-Gobernador Santiago Baibiene. Pero al asumir este último, el acuerdo alcanzado se desequilibró, dividiendo al Liberalismo en dos facciones, una de las cuales dirigida por el guastavinista Emilio Díaz, manifestaba su oposición a través de las páginas de La Provincia.<sup>7009</sup> Vencido a fines de 1871 el mandato de Baibiene, este último impuso electoralmente a su sucesor, desde las columnas de La Patria, en la persona del Dr. Agustín P. Justo,<sup>7010</sup> enfrentándose para ello con la candidatura del Inspector General de Armas Coronel Desiderio Sosa. Sosa se hallaba respaldado por una coalición o pacto conocida como el Fusiónismo,<sup>7011</sup> compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya, la que se expresaba en el periódico *La Fusión*, dirigido por el guastavinista Dr. Emilio Díaz.<sup>7012</sup>

## **M-II La lucha política y la perpetuación de la elite.**

De resultas de las derrotas militares del Paraguay en la Segunda Guerra de la Triple Alianza, de los Colorados Cuyanos en la batalla de San Ignacio (1867), de Felipe Varela en el Pozo de Vargas (1867),<sup>7013</sup> y de los indios Ranqueles bajo el liderazgo de Calfucurá en la batalla de San Carlos,<sup>7014</sup> se volvió a ensayar una lucha política, exenta de enfrentamientos militares, produciéndose una ola de entusiasmo que se tradujo en una sobreoferta de crédito por parte de la banca mundial (Empréstito de 1871) más una ingobernable especulación inmobiliaria. A la par de este Empréstito, Martiré (1965) añade como factor inflacionario el circulante procedente de los gastos practicados por la Flota Brasileña emplazada en la rada de Buenos Aires.<sup>7015</sup>

En La Rioja, merced a la batallas de San Ignacio y Pozo de Vargas, y tras las penurias sufridas con la intervención de las milicias Santiagueñas y la montonera de Felipe Varela,<sup>7016</sup> todos los temores fueron superados inaugurándose una política de perpetuación de la elite. Al Coronel Julio Campos --que venía rigiendo los destinos de La Rioja desde 1864-- lo sucedió el Coronel Tristán Dávila Gordillo,<sup>7017</sup> y a éste su primo hermano el Dr. Guillermo San Román y Dávila,<sup>7018</sup> y en 1867 otro primo hermano Cesáreo Dávila Gordillo.<sup>7019</sup> Argumentando perpetuidad en el cargo y demora en convocar elecciones, el Gobernador Cesáreo Dávila, quien estaba dotado sólo de una legitimidad externa, pues estaba sostenido por los Taboada, fue derrocado el 10 de Noviembre de 1867 por el Gral. Arredondo,<sup>7020</sup> quien sostenía la candidatura presidencial de Sarmiento. Una asamblea de vecinos designó entonces Gobernador Provisorio a Serafín de la Vega y Brizuela.<sup>7021</sup> Esta circunstancia hizo que Dávila reclamara la intervención federal, la cual se concretó en la persona del Secretario de la Presidencia José Manuel de la Fuente. Este último nombró Gobernador Provisorio a Don Vicente Gómez,<sup>7022</sup> quien debió designar una Junta Especial para poder escrutar las elecciones presidenciales, pues fueron boicoteadas por los Taboadistas, interesados en neutralizar a los electores Sarmientistas y apoyar la candidatura continuista de Rufino de Elizalde.<sup>7023</sup> En el debate suscitado en el Senado de la Nación, el Senador Abel Bazán, partidario de Arredondo y enemigo acérrimo de los Taboada, polemizaba con el Senador Santiagueño Absalón Ibarra,<sup>7024</sup> y con el Ministro de Justicia encargado de la cartera del Interior Dr. Eduardo Costa, señalando que el único remedio que encontraba para la anarquía existente en La Rioja era establecer en ella en forma permanente y como mero elemento disuasivo un Batallón del Ejército de Línea.<sup>7025</sup> Mientras Arredondo derrotaba a Dávila, alzado en armas, en el combate de Aimogasta,

Gómez formó la Legislatura y luego el Colegio Electoral. Este último nombró Gobernador Propietario al Dr. José Benjamín de la Vega,<sup>7026</sup> que se hallaba ausente; y Gobernador Interino hasta tanto llegara de la Vega, al Coronel Nicolás Barros.<sup>7027</sup>

El campo de acción política quedó entonces en La Rioja completamente dominado por el Comité Autonomista de Chilecito, un centro político dotado de cierta legitimidad interna y partidario de la candidatura presidencial de Sarmiento, integrado por el clan de los Brizuela y Doria --que comprendía a la familia de la Vega y la casa comercial de Bazán y Luna.<sup>7028</sup> En San Luis, de resultas del triunfo de Arredondo, el Gral. Felipe Sáa fue removido, asumiendo el mando Víctor C. Guiñazú.<sup>7029</sup> Y en Mendoza y San Juan con las dinastías de los Villanueva y los De la Rosa se inauguraba también una política de enajenación de tierras,<sup>7030</sup> de redención de fondos capellánicos,<sup>7031</sup> y de perpetuación de las elites en los altos cargos públicos.

### **M-III La Invernada de Gobernadores o gauchocracia**

• Esta condición vitalicia se lograba mediante el nepotismo y la llamada invernada de Gobernadores, que consistía en que al vencer sus mandatos los Gobernadores se hicieran designar Senadores Nacionales.<sup>7032</sup> Esta política había sido iniciada en San Juan en el pasado reciente por Ruperto Godoy.<sup>7033</sup> Derrotados en Cuyo, en la batalla de San Ignacio, tanto Carlos Juan Rodríguez como los hermanos Sáa y el Coronel Juan de Dios Videla,<sup>7034</sup> el clan de los Corvalán y los Correas, progresivamente emparentado con los Segura, los Ortiz, los García, los Villanueva y los Civit, coparon el escenario político de Mendoza en lo que restó del siglo. El partido liberal, era para el Diputado Nacional del Autonomismo Mendocino Benito Villanueva González,<sup>7035</sup> "...un partido que tiene en su seno este cáncer: ni más ni menos que como sucedía en tiempo de los Taboada en Santiago".<sup>7036</sup> A Nicolás Villanueva García,<sup>7037</sup> que entrara a gobernar Mendoza en 1867, le siguió en 1870 su primo segundo Aristides Villanueva Chenaut.<sup>7038</sup>

Asimismo, para esta época los métodos puramente represivos fueron sustituidos por métodos de control más sofisticados. En una muy ilustrativa misiva enviada desde Mendoza al General Roca, el jurista Manuel A. Sáez,<sup>7039</sup> expresaba que si bien el gobierno provincial ya no contaba con elementos de la nación (Guardia Nacional o Ejércitos de Línea) para oprimir a sus opositores, "...manejan a su antojo los Tribunales en donde han colocado hombres que son verdaderos instrumentos".<sup>7040</sup> En otras palabras,

"...el Ejecutivo ha sustituido en mucha parte la fuerza de que antes disponía con la composición de los Tribunales, que tiene hoy tan subyugados como antes no se ha visto en la provincia".<sup>7041</sup>

El caso de Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y por cuya hegemonía política rivalizaban Concepción del Uruguay y Buenos Aires, difirió del de los casos de Cuyo y de Córdoba, por haber correspondido su jurisdicción militar a otra División. En 1868, ausente el Gobernador Nicasio Oroño sin permiso legislativo, una revolución anti-sistema se adueñó de la provincia, confiando el Gobierno interinamente al Presidente de la Cámara de Justicia, Dr. José Benito Graña, y el Ministerio de Gobierno al Dr. Simón de Iriondo.<sup>7042</sup> El Comisionado enviado por el Ministro Rawson, el Dr. Francisco Pico, denunció como ilegítima la autoridad de Graña, y ordenó al Gral. Emilio Conesa se internase en la Provincia, declarando él mismo repuesto en sus funciones a Oroño.<sup>7043</sup> En nota al Ministro Rawson, el Comisionado Pico decía no creer en la palabra

de paz de los revolucionarios santafesinos (de origen federal), encabezados por el Mayor Nicolás Denis, sino, que por el contrario,

"...este partido, compuesto por todo lo que es hostil al Gobierno Nacional, y [compuesto] de los antiguos federales, tenía una decidida tendencia, como el de Carlos Rodríguez en Mendoza, a una reacción contra los intereses nacionales, que si se le deja tomar cuerpo, no sólo falseará las elecciones de Presidente, sino que puede extenderse hasta Córdoba en rebelión abierta".<sup>7044</sup>

Habiendo reasumido Mitre la Presidencia, a fines de la Guerra, nombró Comisionado en Santa Fé al Dr. Eduardo Costa, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, encargado de la cartera del Interior, quien interesado en la candidatura presidencial de Rufino de Elizalde alcanzó un acuerdo con los rebeldes. Concluido el mandato de Oroño, la Legislatura se reunió en Rosario y nombró Gobernador Interino a Camilo Aldao,<sup>7045</sup> conocido partidario de la candidatura presidencial de Sarmiento.<sup>7046</sup> El Ministro Costa encontraba con razón que el parentesco inmediato entre el Gobernador saliente Nicasio Oroño,<sup>7047</sup> y el Gobernador Interino Camilo Aldao, ambos con residencia en Rosario, reducto del llamado Cullismo (que fuera partidario del Liberalismo Mitrista Porteño), provocaba agitación en la ciudad de Santa Fé, fortaleza del Lopizmo (que fuera partidario de la Confederación).<sup>7048</sup> Como Aldao repudió públicamente las intromisiones de Costa en la administración de justicia santafesina, que ultrajaban su autonomía, el Dr. Costa retiró la intervención, embarcándose con sus fuerzas, a las cuales se sumaron el propio Aldao e incluso Oroño.<sup>7049</sup> Finalmente, las elecciones gubernativas se verificaron, resultando derrotado Marcelino Freyre,<sup>7050</sup> apoyado por Oroño;<sup>7051</sup> y electo Mariano Cabal Lassaga,<sup>7052</sup> y electores a Presidente los partidarios de la candidatura presidencial de Urquiza.<sup>7053</sup> De la lectura del Apéndice SF-XII podemos visualizar como en Santa Fé los parentescos entre los gobernadores liberales o Mitristas seguían en la segunda mitad del siglo XIX las mismas pautas que cultivaban en el siglo XVIII los propios miembros del Cabildo, comparables sólo con las practicadas en ese entonces en Jujuy por la familia Sánchez de Bustamante.<sup>7054</sup>

Y en Entre Ríos, la Esparta Argentina, el caudillo Ricardo López Jordán, aliado a los Blancos Uruguayos, se rebeló contra el gobierno nacional presidido por Sarmiento y el gobierno provincial vitalicio de Justo José de Urquiza, quien por resistirse cayó asesinado. Esta rebelión y crimen políticos, que sin duda constituyó un shock o sustitución de fracturas que incidió por décadas en la historia de Entre Ríos, obedeció en parte al desprestigio que le significó a Urquiza sus reiteradas reelecciones o desmesurado continuismo, y al desastre financiero del empréstito Fraguero.<sup>7055</sup> Dicha rebelión siguió como un efecto dominó a la guerra civil iniciada el mismo año por el caudillo Blanco, Timoteo Aparicio, en la República Oriental del Uruguay, durante la presidencia de Lorenzo Batlle, conocida como la Revolución de las Lanzas,<sup>7056</sup> y a la seguidilla de crímenes políticos ocurridos en la década previa en San Juan (Benavídez, Virasoro, y Aberastain) y en Córdoba (Justiniano Posse).<sup>7057</sup> La rápida y efectiva represión ordenada por Sarmiento,<sup>7058</sup> y la intervención federal que no esperó requisitoria alguna de los poderes entrerrianos y fue ratificada más luego por el Senado Nacional,<sup>7059</sup> obedeció al impacto que suscitó en la opinión pública nacional e internacional el crimen del ex-Presidente de la Confederación Argentina y Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza y a la necesidad de impedir la llegada de refuerzos procedentes de los Blancos orientales ya entonces sublevados.<sup>7060</sup> Pero el mal resultado de la Montonera Blanca de la República

Oriental, dirigida por Timoteo Aparicio, que terminó en la llamada Paz de Abril de 1872, desanimó a las tropas Jordanistas precipitando su derrota.<sup>7061</sup>

Para 1867, la campaña por la sucesión presidencial también contribuyó a desequilibrar las situaciones provinciales. En La Rioja, y las provincias del subsistema político del Norte (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) a diferencia de lo sucedido en los subconjuntos políticos del Centro y de Cuyo, el desequilibrio de la balanza del poder regional fue provocado por intereses puramente electorales. En La Rioja, provincia correspondiente al subconjunto político del Centro, y cuyo predominio era disputado por las sedes de la División del Oeste y del Norte, mientras la familia Dávila, apoyada por los Taboada, se jugó por el candidato Mitrista a la presidencia Rufino de Elizalde; el clan de los Brizuela y Doria optó por la candidatura anti-continuista de Sarmiento, auspiciada por Arredondo.<sup>7062</sup> En Santiago del Estero --perteneciente al subconjunto político del Norte, y a cuya hegemonía política aspiraban Tucumán, Córdoba y Buenos Aires-- el apoyo a la candidatura continuista de Elizalde por parte de los Taboada fue indeclinable. Sin embargo, el Gobernador Alejandro Montes,<sup>7063</sup> sucesor de Manuel Taboada, asumió en Diciembre de 1870 y fue destituido mediante juicio político el 24 de Junio de 1871 apenas se comprobó que estaba en conversaciones con el Gral. Ignacio Rivas, partidario de la candidatura patrocinada por Sarmiento.<sup>7064</sup> En Malazán, La Rioja, la aplicación de la ley 623 dio lugar a lo que se denominaba votación alternativa, una suerte primitiva de lo que hoy se conoce por Ley de Lemas,<sup>7065</sup>

"...dos fracciones, una con el nombre del Dr. [Manuel] Quintana, otra con el nombre del Dr. [Adolfo] Alsina, sostenían la candidatura del Sr. Diputado que presenta el diploma [Guillermo San Román], y solo había un partido que sostenía la candidatura de su opositor o rival".<sup>7066</sup>

La mesa electoral, al recibir la votación, "...consideraba como partidos distintos a cada una de las fracciones que sostenía la lista del Dr. San Román, y recibían un voto de cada uno de los tres partidos".<sup>7067</sup> De tal manera que mientras los partidos daban dos votos al Dr. San Román, "...el otro por ser solo, no daba sino un voto a la candidatura contraria".<sup>7068</sup> Esto era para el Diputado José Benjamín de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".<sup>7069</sup>

En Tucumán, concerniente al subsistema político del Norte, y cuya supremacía política era disputada tanto por Santiago del Estero como por Córdoba, sedes de las respectivas Comandancias Militares, las rivalidades engendradas por la elección presidencial provocaban, tal como lo venimos demostrando, crisis terminales en el organismo político. Dado que el Gobernador Wenceslao Posse,<sup>7070</sup> y su clan familiar, jugaron a favor de Sarmiento; el Club del Pueblo, encabezado por Octavio Luna,<sup>7071</sup> partidario al igual que los Taboada del candidato mitrista Rufino de Elizalde, gestó una asonada que dió por tierra con el gobierno de los Posse.<sup>7072</sup> Producto del desplazamiento sufrido en el gobierno de Octavio Luna la familia Posse encabezó en 1868 una serie de alzamientos infructuosos, pues a la postre las actas del Colegio Electoral de Tucumán se traspapelaron.<sup>7073</sup> Pero una vez que Sarmiento ocupó la presidencia, merced al nombramiento como Comisionado del Gral. Ignacio Rivas --en reemplazo del Mayor Julio A. Roca-- se acordó el desplazamiento de Luna, quien se había propuesto imponer como Gobernador a su cuñado Nabor Córdoba.<sup>7074</sup> Asimismo, Rivas designó como Gobernador Interino a Belisario López,<sup>7075</sup> en cuyo mandato se convocó a elecciones, triunfando en

1869 el candidato Sarmientino Uladislao Frías por sobre el candidato mitrista Juan C. Méndez.<sup>7076</sup>

En Salta, también perteneciente al subconjunto político del Norte, y por cuyo predominio político también rivalizaban Santiago del Estero y Córdoba, las instituciones políticas estuvieron transitoriamente a merced de la Montonera encabezada por Felipe Varela. Electo en Abril de 1868 el Gobernador Sixto Ovejero,<sup>7077</sup> debió hacer frente a las huestes de Varela. Sus críticas estuvieron dirigidas a las fuerzas nacionales comandadas por el Coronel Martín Cornejo,<sup>7078</sup> "...formadas por muchos de los prisioneros tomados a Varela".<sup>7079</sup> Estas fuerzas fueron las que en las elecciones de Diputados para integrar la Legislatura sostuvieron el Partido Federal, es decir, al Club del Pueblo, que apoyaba la candidatura de Urquiza, en contra del Club Sarmiento que sostuvo la de este último.<sup>7080</sup> Pero Ovejero no pudo gobernar debido a la tutela que sobre ellos ejercía el Comandante Cornejo, un político adicto a Mitre y a los Taboada. Para destrabar esta situación, Sarmiento envió al Coronel Julio A. Roca, quien con habilidad supo despojar a Cornejo de su fuerza y trasladarlo finalmente a Buenos Aires.<sup>7081</sup> Cumplida su misión Roca escribió al Ministro de Guerra, advirtiéndole que para mantener la paz en la región era absolutamente indispensable la caída de los Taboada, y concluía ofreciéndose para ello, expresando: "...Yo podría encargarme de ello, con la seguridad de no comprometer a nadie. Yo sé como se hacen [las] revoluciones en estos pueblos sin tomar parte de ellas".<sup>7082</sup> En Salta, habiéndose dictado en 1873 una nueva ley electoral (Ley 623), que prescribía el tiempo, modo y forma en que habían de hacerse las elecciones de diputados al congreso nacional, y en vísperas de las elecciones de Febrero de 1876, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz, comenzó a indagar a sus partidarios por las inscripciones del Registro Cívico Provincial, de lo que resultó

"...que en época pasada, cuando los Uruburu dominaban, habían recogido todas las inscripciones de manera tal, que no contábamos con qué hacer votar a la inmensa cantidad de jente que teníamos".<sup>7083</sup>

En Jujuy, también correspondiente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía política era disputada por Salta, por fallecimiento del Gobernador Restituto Zenarruza,<sup>7084</sup> quien fuera sucesor de Pedro Portal,<sup>7085</sup> asumió el mando como Gobernador Provisorio Mariano Iriarte.<sup>7086</sup> Este último fué sorprendido por una revuelta con epicentro en Tilcara, dirigida por José María Álvarez Prado,<sup>7087</sup> quien en León derrotó el 3-XI-1870 a Iriarte. Según Noble (1960) la revuelta estuvo encabezada por el Senador Teodoro Sánchez de Bustamante,<sup>7088</sup> que obligó a Iriarte a refugiarse en Salta.<sup>7089</sup> A pedido de Pepe Posse, (a) "Dr. Amoníaco", Sarmiento designó como Comisionado a Uladislao Frías, quien mediante una renovada Legislatura eligió como Gobernador a Pedro Portal, primo hermano del Senador Sánchez de Bustamante, garantizando de esta forma los Electores presidenciales para la candidatura patrocinada por Sarmiento.<sup>7090</sup>

Por último, en San Juan, concerniente al subconjunto político de Cuyo, y por cuya supremacía política competían tanto Mendoza como Córdoba, el gobierno de Manuel J. Zavalla Merlo, progresivamente inclinado hacia el Mitrismo, halló a su Legislatura dividida en dos partes iguales: los Mitristas, partidarios del ex-Ministro de Mitre Dr. Guillermo Rawson; y los Sarmientistas, partidarios del ex-Ministro de Gobierno de Sarmiento Don Valentín Videla.<sup>7091</sup> Cuando este equilibrio se volcó a favor de la oposición dirigida por Videla, el Gobernador Zavalla anuló lo actuado y sometió a proceso y prisión a los legisladores. Reinstalada la Legislatura por intervención del Comisionado Luis Vélez,

enviado por Sarmiento, el Gobernador Zavalla la desconoció. Reclamada nuevamente la intervención por la Legislatura, Sarmiento envió como Comisionado al Gral. Arredondo y dictó para ello la Ley Marcial.<sup>7092</sup> Desconocidas por Zavalla las leyes dictadas por la Legislatura, esta última resolvió en 1869 suspender y enjuiciar al Gobernador. Este fue reemplazado por Ruperto Godoy y los pedidos de intervención formulados por Zavalla, discutidos en el Senado Nacional, fueron desoídos por Sarmiento quien aprobó todo lo obrado por Arredondo.<sup>7093</sup>

La grave corruptela desatada en el Senado con la invernada de los Gobernadores,<sup>7094</sup> fue acompañada en San Juan con una campaña antirreligiosa de supresión de conventos que culminó con el proceso y prisión de Monseñor Braulio Laspiur.<sup>7095</sup> Ello provocó en 1870 una frustrada revolución Mitrista encabezada por el ex-Gobernador Manuel J. Zavalla, coaligado con el bandolero Santos Guayama.<sup>7096</sup> A José M. del Carril, quien se hallaba fatigado por la hostilidad con que lo antagonizaba el mitrista Manuel J. Gómez Rufino,<sup>7097</sup> lo sucedió en 1871 el Coronel Valentín Videla.<sup>7098</sup> Al caer asesinado Videla en Diciembre de 1872, dejó acéfalo al partido del Club del Pueblo,<sup>7099</sup> y abrió en sus filas tal abismo que lo dividió en dos grupos profundamente enemistados: el uno a favor de la candidatura presidencial de Carlos Tejedor, dirigido por el mendocino Benjamín Bates,<sup>7100</sup> y apoyado por el Diputado Nacional Rafael Igarzábal,<sup>7101</sup> y el otro partidario de la candidatura continuista, apadrinada por Sarmiento, que resultó a la postre Nicolás Avellaneda, encabezado por el Jefe de Policía Agustín Gómez,<sup>7102</sup> y apoyado por el Senador Nacional José María Carril.<sup>7103</sup> Fraude mediante y a instancias del Gral. Arredondo, Benjamín Bates "...hombre de carácter y de partido, amigo de la víctima [Videla], de posición espectable, bien reputado y estimado de sus amigos y adversarios", sucedió interinamente a Videla en el gobierno, para luego hacerlo en propiedad.<sup>7104</sup> Pero en el transcurso de su breve gestión, que duró un mes, el Jefe de Policía Agustín Gómez, que era partidario de la candidatura de Avellaneda, apadrinada por Sarmiento, se puso de acuerdo con el Jefe y los oficiales de la Guardia Municipal, con Rosauro Doncel,<sup>7105</sup> y con Manuel María Moreno,<sup>7106</sup> volcando la situación a su favor, mediante un cuartelazo, al reemplazar a Bates con Faustino Espínola.<sup>7107</sup>

El gran partido del Club del Pueblo se dividió otra vez en dos: en el poder la fracción revolucionaria, y la otra "...buscando reposición, y Gómez confinado en San Rafael [Mendoza]".<sup>7108</sup> Después de ensayar Gómez una frustrada conciliación --para ese entonces carecía de partido propio-- regresó en 1873 a San Juan, destituyó a Espínola, y dejó en el poder a Manuel José Gómez Rufino, uno de los Jefes más radicalizados del mitrista Club Libertad.<sup>7109</sup> Durante este gobierno, el confinado Agustín consiguió volver a San Juan y ser absuelto, enviando el gobierno federal primero como delegado confidencial a Estanislao Tello y luego como Comisionados a Santiago Cortínez y Francisco Sarmiento; pero lo que Gómez no logró fue que se interviniera la Legislatura.<sup>7110</sup> Pero la crisis política en Cuyo continuaba pues en Mendoza se sucedieron una serie de golpes de estado: primero a favor de Mitre, con la sublevación en 1873 del Jefe de la Guarnición de San Rafael Coronel Ignacio Segovia; luego a favor de Avellaneda, con la reposición de Francisco Civit;<sup>7111</sup> y por último, a favor de Mitre, con la infausta muerte del Jefe de la Guarnición de Villa Mercedes Gral. Ivanowski y la consiguiente invasión del Gral. Arredondo a Mendoza y San Juan.<sup>7112</sup> Lisandro Laval señalaba que para ese entonces, en San Juan, dos o tres veces intentó Agustín Gómez una revolución, "...siendo sentido y puesto en el caso de irse o fugarse a Mendoza, donde lo sorprendió la primera [batalla de] Santa Rosa [1874]".<sup>7113</sup> Definida la situación, en la segunda batalla de] Santa Rosa (1874), a favor del

Partido Nacional, con Avellaneda de Presidente, Agustín Gómez pudo apuntalar en San Juan como gobernadores a Hermógenes Ruiz y Rosauro Doncel.<sup>7114</sup>

En esta tercera etapa de la Organización Nacional, que se inició en San Jacinto (1867) y se interrumpió con La Verde (1874), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, y secundariamente mediante el fraude electoral, los pactos o negociación internotabiliar, o las reivindicaciones religiosas.

### **Capítulo III-D-14. Debacle de la elite nacional-mitrista y origen de la oligarquía autonomista (1874-1876)**

Índice

N-I Gobernadores Electores para burlar la voluntad popular

N-II Requisitorias de intervención federal.

#### **Introducción del capítulo III-D-14.**

Una crisis financiera mundial que dio inicio a la fase de estancamiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1870/75-1893/96),<sup>7115</sup> aunada a la derrota de Francia en su guerra contra Prusia (1870),<sup>7116</sup> y al auge del Bonapartismo alemán (Bismarkismo), despertó una profunda inquietud en toda América Latina, llegando en algunos lugares que constituían el eslabón mas débil, como el Uruguay, a generar una pionera involución o contraola regresiva.<sup>7117</sup> Asimismo, una nueva crisis sucesoria en la historia de las transiciones políticas argentinas, que dividió las aguas entre las candidaturas de Mitre y Avellaneda, abrió en 1874 hondos desajustes o desviaciones en toda la república.<sup>7118</sup> La crisis financiera, que suspendió la conversión monetaria, fue acelerada por la caída mundial de los precios del trigo y la interrupción de las líneas de crédito externo.<sup>7119</sup> Esto precipitó el fracaso de la Reforma Agraria intentada en Buenos Aires con la Ley de Tierras de 1871. Sin embargo, a partir de 1876, a juzgar por el primer ciclo del primer período (1876-85) registrado por Di Tella y Zymelman (1973), la economía argentina comenzó una lenta recuperación.<sup>7120</sup>

Esta crisis fue la que nos inclinó a formularnos una serie de reflexiones. Las rupturas, desajustes y crisis políticas provinciales acontecidas en Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876; en Jujuy en 1870; y en La Rioja en 1873 (Cuadro I) habrían padecido de una asincronía muy marcada. La Rebelión de López Jordán en Entre Ríos (1870) habría tenido una estrecha vinculación con el posterior golpe de estado de Corrientes en 1871. La Rebelión de La Verde en 1874, en la Provincia de Buenos Aires, habría tenido una necesaria relación con la denominada Revolución Tricolor (1875), acontecida en la República Oriental del Uruguay, y con las insurrecciones de Plácido Martínez en Corrientes. La Rebelión de Santa Rosa en 1874, en San Luis, tuvo una previa ligazón con el derrocamiento de Francisco Civit en Mendoza y de Manuel Gómez en San Juan, ocurridos en 1873. Y la derrota del Mitrismo en La Verde y en Santa Rosa (1874) tuvo un vínculo necesario con la caída de los Taboada en Santiago del Estero.

La crisis y los desajustes políticos se hicieron sentir en cada uno de los cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral). En Corrientes, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía política se la disputaban las candidaturas presidenciales de Mitre y Avellaneda, el ambiente político se había encrespado más de la cuenta. Más precisamente, la crisis había llegado al extremo de que un grupo sedicioso encabezado por el Coronel Desiderio Sosa detuvo al Gobernador Agustín P. Justo.<sup>7121</sup> Embarcado Sarmiento en el conflicto con López Jordán, en Entre Ríos, no pudo ni quiso hacerse cargo de una intervención federal.<sup>7122</sup> Tras una serie de enfrentamientos armados (Paso del Medio, Laguna Candé y Loma del Tabaco), en que el Coronel Santiago Baibiene y sus fuerzas Mitristas fueron finalmente derrotadas, Justo fue sustituido en 1872, en la gobernación provisoria, por un Triunvirato que integraba el Cnel. Sosa, apoyado por el Fusionismo,<sup>7123</sup> que a su vez patrocinaba la candidatura apadrinada por Sarmiento.<sup>7124</sup> Pero esta inestable coalición entró en crisis rápidamente cuando Sosa exigió las renuncias del federal Tomás Vedoya y del guastavinista Emilio Díaz, recayendo la autoridad en Gregorio Pampín.<sup>7125</sup> Este último disolvió la Legislatura y convocó a elecciones resultando triunfante en mayo de 1872 nuevamente el Fusionismo, en las personas de Manuel Victorio Gelabert y Wenceslao F. Cabral.<sup>7126</sup> La cuestión siguió en la Cámara de Diputados, donde Guillermo Rawson aconsejó infructuosamente la intervención federal.<sup>7127</sup> Producida en 1874 la insurrección de Mitre en la Provincia de Buenos Aires, repercutió en el Uruguay, con la fracasada Revolución Tricolor (1875), que dio nacimiento a la dictadura del Coronel Lorenzo Latorre;<sup>7128</sup> y en Corrientes, con la insurrección de Plácido Martínez, donde las fuerzas nacionales del Coronel Manuel Obligado lograron repelerla.<sup>7129</sup> Convocada Corrientes nuevamente a elecciones, en 1875, resultó victorioso otra vez el Fusionismo en las personas del liberal Juan Vicente Pampín,<sup>7130</sup> y el federal José Luis Madariaga.<sup>7131</sup>

En Entre Ríos, perteneciente al subsistema político del Litoral, y por cuya supremacía política competían también Mitre y Avellaneda, la crisis política fue alimentada por los medios masivos (prensa escrita), donde el periódico La Pampa (Paraná), dirigido por el Mitrista Ezequiel Paz,<sup>7132</sup> combatía encarnizadamente al gobierno de Leónidas Echagüe,<sup>7133</sup> defendido por el periódico La Libertad (Paraná).<sup>7134</sup> Pero la crisis política más significativa se manifestó militarmente. El caudillo Ricardo López Jordán se volvió a rebelar contra los poderes nacionales en 1873, durante la primer gobernación de Leónidas Echagüe, cuando fue batido en la batalla de Don Gonzalo;<sup>7135</sup> y por tercera vez en 1876, cuando fue derrotado en Alcaracito, Departamento de La Paz, por el Coronel Juan Ayala.<sup>7136</sup> En segundo lugar, la crisis de sucesión terminó por desencadenar, so pretexto del fraude electoral, una rebelión de tintes populistas encabezada por Bartolomé Mitre en La Verde y por el Gral. José Miguel Arredondo, (a) "El General Elector", en Santa Rosa, cuyo impacto se hizo sentir en toda la República, proyectando nacionalmente la figura de su triunfador el Gral. Julio A. Roca. De 1873 a 1874 el Río de la Plata volvió a experimentar una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo. Las derrotas militares, a las que contribuyó la pionera utilización del remington y el telégrafo, le significaron al Nacionalismo Mitrista un desprestigio tal que derrumbó casi todas las combinaciones políticas que arduamente había enhebrado en el pasado, incluido el enclave político santiagueño en poder de los Taboada, único hasta el momento exento del influjo de la segunda ola progresiva (1852-80). Con respecto a San Luis, el Diputado Onésimo Leguizamón reprochaba a la Cámara de Diputados de la Nación, que nunca hubiera mandado ninguna Comisión o Diputación para que remediara sus males, pues

"...ha sido por largos años dominada por el Ejército de las fronteras, o más bien por sus jefes. ¡Siempre los Gobiernos haciendo los Diputados al Congreso y a la Legislatura de Provincia!".<sup>7137</sup>

Munido de los recuerdos de motines militares,<sup>7138</sup> el Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. Julio A. Roca,<sup>7139</sup> quien en ese entonces era un ferviente admirador del Diputado Onésimo Leguizamón,<sup>7140</sup> y estaba a las órdenes del Gral. Arredondo, le manifestaba al Diputado Nacional Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como el caso del Comandante Moreno, candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad que residen a solicitar puestos públicos".<sup>7141</sup> Instigado por el Gral. Arredondo, el Gobernador Lúndor Quiroga, secundado por su Ministro Jacinto Videla,<sup>7142</sup> se rebeló en 1874 contra el Gobierno Nacional, siendo suplantado luego de la derrota de Santa Rosa por el Presidente de la Legislatura Rafael Cortés,<sup>7143</sup> y por Toribio Mendoza,<sup>7144</sup> fundadores del Partido Nacional en San Luis.<sup>7145</sup> El Mitrismo, según Onésimo Leguizamón, merecía su caída, "...por que fue siempre un partido de exclusión, cuando no fue un gobierno de familia, como ha sucedido en San Luis, en Santa Fé, en Santiago, y en Jujuy".<sup>7146</sup> Con relación a la manipulación de la Dirección de Correos y Telégrafos, y su incidencia en el control político, en 1878, el Diputado Nacional Toribio Mendoza y el Gobernador Rafael Cortés le escribían a Roca haciéndole presente la necesidad que había de cambiar a su Administrador de Correos, por no ofrecer

"...garantía alguna para la correspondencia por sus malas condiciones, aparte de otros defectos capitales que lo inhabilitan para ocupar este puesto y que no quiero mencionar por ser muy conocidos de la generalidad".<sup>7147</sup>

Con razón entonces, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con tanta elocuencia que

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".<sup>7148</sup>

En Mendoza, correspondiente al subconjunto político de Cuyo, donde el predominio político también se lo disputaban Mitre y Avellaneda, luego que el liberal Francisco Civit,<sup>7149</sup> apoyado por el periódico *El Constitucional* (Mendoza),<sup>7150</sup> derrotó electoralmente a los Gonzalistas o Mazorqueros, de filiación Derquista, que sostenían a Carlos González Pinto,<sup>7151</sup> el Gral. Arredondo lo derrocó en la primer batalla de Santa Rosa.<sup>7152</sup> A diferencia de *El Constitucional* --que apoyó en 1873 la candidatura de Civit para Gobernador de Mendoza, contra la de Carlos González-- Lauro Galigniana Villanueva le advertía a Roca que no se fiara de la supuesta adhesión de los periódicos *El Pueblo* (Mendoza),<sup>7153</sup> y *El Artesano* (Mendoza),<sup>7154</sup>

"...porque no son más que periódicos quebristas para sostener y defender los intereses de los González,<sup>7155</sup> para que se queden estos con sus intereses dejando ignominiosamente en la calle a sus acreedores, pues para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".<sup>7156</sup>

La condición vitalicia se lograba mediante el nepotismo y la llamada gauchocracia o invernada de Gobernadores, que consistía en que al vencer sus mandatos los Gobernadores se hicieran designar Senadores Nacionales. Luego del interregno (1873) de

Francisco Civit, pasó el gobierno en 1876 a manos de su medio hermano Joaquín Villanueva Carrillo,<sup>7157</sup> primo hermano de Francisco Civit y medio hermano de Arístides Villanueva; apoyado por el Club Liberal y el partido Gonzalista,<sup>7158</sup> en 1878 y de manos de éste a su primo segundo Don Elías Villanueva Delgado (Cuadro M-I).<sup>7159</sup> Según Lisandro Moyano, el interregno de Civit les había hecho perder a los Villanueva

"...las posiciones ventajosas desde las cuales jaqueábamos mortalmente la política de Civit presentándolo ante el pueblo distanciado del Gobierno Nacional sin mas sostén que el de su círculo pequeño y desprestigiado".<sup>7160</sup>

Los partidarios de Civit susurraban que era Roca

"...quien ha movido y hecho declarar la oposición en la Legislatura y que es por esto que la oposición encuentra simpatías en los mazorqueros [Gonzalistas o Derquistas], a pesar de que los que constituyen esa oposición son de los que formaban en sus filas (salvajes a toda prueba)".<sup>7161</sup>

Los propósitos de la oposición eran

"...romper la barrera de exclusivismo de partido llevada a su última expresión por Civit y adaptándose a la política que Vd. inició después de Santa Rosa [1874] y que vemos sostenida por el Gobierno Nacional".<sup>7162</sup>

Esta política era la de formar un partido nacionalista

"...al que ingresaran todos los círculos en que se hayaba [sic] dividida la opinión a excepción de los gobiernistas o Joaquinistas [por Joaquín Villanueva] y los Mitristas [o Palacistas: Deoclesio García y Francisco Calle] que parece empiezan a tomar nuevo aliento".<sup>7163</sup>

Y en Santiago del Estero, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuya hegemonía política habían rivalizado las candidaturas presidenciales de Mitre y Avellaneda, la crisis de sucesión se acentuaba. El Gobernador Absalón Ibarra,<sup>7164</sup> pariente e íntimo socio político de los hermanos Taboada, jaqueado por el Presidente Avellaneda, renunció a su cargo, siendo reemplazado por Octavio Gondra.<sup>7165</sup> Este último, tras un envío de tropas a solicitud de un Juez Federal, también renunció,<sup>7166</sup> siendo sustituido por Gregorio Santillán, (a) "Goyo Suelas".<sup>7167</sup> A raíz del cambio político operado, el Senador Nacional Luciano Gorostiaga sufrió un atentado.<sup>7168</sup> En Salta, la inestabilidad crónica encontraba sus raíces en los enfrentamientos clánicos. El clan de los Uriburu, partidario de Mitre, se enfrentó primero con el de los Leguizamón, y más luego con el de los Ortices, adictos a Avellaneda y al Partido Nacional. En mayo de 1873, en oportunidad de la sucesión del Gobernador Delfín Leguizamón Cobo,<sup>7169</sup> el Coronel Napoleón Uriburu le transmitió a Julio A. Roca que si aquél "...quiere imponer a la Honorable Legislatura, a requisición de la mayoría, haré respetar el sagrado recinto".<sup>7170</sup> Y si

"...quiere hacer él mismo [Delfín] la revolución para que se quede ejerciendo el ejecutivo su [medio] hermano Juan Martín [Leguizamón Goicoechea], tendrán que matarlo sus propios partidarios a Don Delfín, pues de otro modo lo repondré para que se haga la elección".<sup>7171</sup>

El caso de Jujuy, perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya supremacía política la disputaba Salta, pero donde también se hizo presente la lucha entre Mitre y Avellaneda, fue el de una localidad fraccionada entre el partido de los Conspicuos y la facción Barcenista, y profundamente enemistados por conflictos originados en una fractura étnico-lingüística. Esta fractura se reflejaba en la contradictoria conducta observada con las comunidades indígenas de la Quebrada de Humahuaca y con el rol que cumplía el Ejército de Línea (Nacional), custodio de la frontera chaqueña. Las enemistades nacidas de esta fractura se proyectaban políticamente en candidaturas presidenciales opuestas.<sup>7172</sup> El partido de los Conspicuos, muy semejante al de los Beatos de San Juan, estaba formado según relataba Benjamín Posse, por "...los viejos jujeños con guante blanco y bastón de guayacán labrado y puño de oro",<sup>7173</sup> entre los cuales estaba la familia de los Sánchez de Bustamante,<sup>7174</sup> fue partidario primero de la Confederación Argentina; producida Pavón, fue primero adicto a Mitre y luego a Sarmiento; y cuando Sarmiento se pronunció en 1874 a favor de Avellaneda fue adicto a Mitre.<sup>7175</sup> Y la facción Barcenista estaba constituida por los clanes familiares de los Bárcena, los Carrillo, los Padilla, los Álvarez Prado, los Blas, y los Ojeda, y el cuñado Comandante Napoleón Urriburu,<sup>7176</sup> adictos a Avellaneda y al partido Nacional.<sup>7177</sup>

El clan de los Sánchez de Bustamante, eje central de los llamados Conspicuos, si bien había gobernado sin solución de continuidad desde la caída de Rosas (Cuadros J-I al J-III, y Apéndice J-I), había perdido violentamente en febrero de 1874 el poder político a manos de la facción liderada por el ex-Gobernador José Benito de la Bárcena,<sup>7178</sup> y su candidato a Gobernador Cátulo Aparicio,<sup>7179</sup> simpatizantes del Partido Nacional y de su postulante presidencial Nicolás Avellaneda. La rebelión Barcenista de Febrero de 1874 obedeció al hecho de que el Gobernador Conspicuo Teófilo Sánchez de Bustamante,<sup>7180</sup> había suspendido por dos semanas las elecciones de diputados nacionales en dos departamentos cuyos cómputos a favor de sus parientes modificaba el resultado de las que había ganado el candidato Aparicio (ligado a los Barcenistas).<sup>7181</sup> Esta rebelión o levantamiento, al detener al Gobernador, obligarlo a firmar la renuncia y exigirle a la Legislatura su aceptación, provocó un intenso debate en la Legislatura provincial, lugar donde el Gobernador contaba con la presencia de un tío y cuatro primos sobre un total de 18 miembros.<sup>7182</sup> Al requerir el Gobernador infructuosamente la intervención federal, dio lugar a un serio debate en el Parlamento Nacional, ámbito donde el Diputado Catamarqueño Lisandro Olmos le recordaba al Diputado Teodoro Sánchez de Bustamante que en Jujuy "...ha gobernado una familia por espacio de 23 años, sucediéndose en el Gobierno, de tíos a sobrinos, de sobrinos a tíos";<sup>7183</sup> y el Diputado Sanjuanino Rafael Igarzábal rememoraba que el sólo hecho de que los Sánchez de Bustamante gobernarán Jujuy desde hacía veinte años, justificaba la revuelta Barcenista.<sup>7184</sup> En ese mismo debate, el Diputado Sánchez de Bustamante juzgó que por ser la mitad de la provincia de Jujuy compuesta por su propia familia estaba "...matemáticamente representado aquel pueblo con dos firmas de parientes y dos de extraños".<sup>7185</sup> Por otro lado, Sánchez de Bustamante atribuía con acierto el nepotismo Jujeño a los fundadores de Jujuy por haber tenido

"...la peregrina idea de ir a poner allí, lejos de las vías de comunicación y de los centros de población, donde no va la inmigración que descentraliza las familias".<sup>7186</sup>

La acusación de aristocracia recaída en los Sánchez de Bustamante no había sido sólo una muletilla, pues dicha familia se hallaba íntimamente emparentada con la de los Alvarado, los Portal, los Echavarría, los Quintana, y los Tezanos Pintos, al extremo que de once

matrimonios celebrados en su primera generación, siete (o el 64%) lo fueron entre primos hermanos.<sup>7187</sup>

El Senador Nacional Guillermo Rawson,<sup>7188</sup> fiel a la práctica política sentada desde que fuera Ministro del Interior de Mitre, tenía miedo en 1873 a las doctrinas que se acababan de sentar a propósito de las elecciones de Santa Fé, donde el Gobernador Simón de Iriondo se había hecho presente en un club político en apoyo a su candidato (Servando Bayo),

"...cuando se vé que la influencia de un gobernador puede decidir en la elección; de modo que el Presidente de la República vá a ser elegido por la mayoría de los Gobernadores de Provincia y que toda elección hecha de esa manera, vá a ser aprobada por el Congreso".<sup>7189</sup>

## **N-I Gobernadores Electores para burlar la voluntad popular**

En los casos específicos, en que lo que estaba en juego era la sucesión del Presidente de la República, los Gobernadores eran denominados en la jerga política Gobernadores Electores, por cuanto su función era burlar la voluntad popular. En La Rioja, con la presidencia de Sarmiento y la Comandancia del Gral. Arredondo, pudo consolidarse en 1871 la gobernación de Pedro Antonio Gordillo.<sup>7190</sup> Pero como Arredondo estaba claramente a favor de la reelección de Mitre, las fuerzas del Autonomismo Nacional vieron que trayendo a La Rioja desde Buenos Aires a un pariente del Gobernador claramente enfrentado al Mitrismo como el Coronel José Olegario Gordillo,<sup>7191</sup> era posible revertir la situación.<sup>7192</sup> En efecto, en Enero de 1873, estalló en la ciudad un infructuoso motín militar contra el gobierno, instigado por el Jefe de la Guarnición Cnel. Gordillo y un clérigo de apellido Linch,<sup>7193</sup> con participación del Partido Nacional, concretándose en un infructuoso ataque al Cabildo de la ciudad, que fue rechazado

"...dándose muerte a quien comandaba a los revoltosos, y que para rechazar ese ataque se movilizarían 200 Guardias Nacionales, y se reunieron también para ponerse en guardia contra la amenaza que se decía hacía el Gobierno Nacional, con la presencia en la ciudad de La Rioja del coronel Gordillo".<sup>7194</sup>

Derrotadas en el mismo año 1874 las rebeliones del Cnel. Gordillo en La Rioja, del Gral. Mitre en La Verde, y del Gral. Arredondo en Santa Rosa, y habiendo renunciado Adolfo Alsina a la candidatura presidencial, Autonomistas y Nacionalistas se confundieron en una misma postulación dando el triunfo a Avellaneda para Presidente.<sup>7195</sup> En La Rioja, la coalición entre Autonomistas y Nacionalistas dio el triunfo a Rubén Ocampo y Dávila para Gobernador, y a su primo el Dr. Guillermo San Román Dávila para Diputado Nacional.<sup>7196</sup> En Chilecito, La Rioja, con motivo de las elecciones de 1874, el Diputado José Benjamín de la Vega denunciaba que el Comandante de la Guardia Nacional movilizó sus fuerzas, y donde "...hay movilización de fuerzas, donde se largan para que vayan a votar, para tocarles la llamada a la tarde", concluía "...que la elección no se ha hecho legalmente".<sup>7197</sup> A juicio del Diputado de la Vega, hubo en La Rioja desde un principio tres partidos:

"...uno que se iniciaba bajo el nombre del Dr. Tejedor, primero, y del Dr. Quintana más tarde; otro, bajo el nombre del Dr. Alsina; otro, que sostenía la candidatura del

Dr. Avellaneda, y había un cuarto candidato, que tenía también su partido presidido por el Sr. D. Natal Luna".<sup>7198</sup>

Dos años después, en 1876, la misma confluencia de fuerzas eligió de Gobernador a Vicente Almandos Almonacid.<sup>7199</sup>

## **N-II Las requisitorias de intervención federal.**

Gran parte de los conflictos de sucesión o transición se dirimían entre amenazas de juicio político y requisitoria de intervención federal. En La Rioja, contra todos los pronósticos, el Gobernador Almonacid se enfrentó a la Legislatura --a raíz de un pedido de Informes provocado por el escamoteo de un empréstito para obras públicas-- la cual respaldada por el Ministro del Interior Saturnino Laspiur solicitó la intervención federal. Como el pedido de intervención fue rechazado por la Cámara de Diputados, la Legislatura le inició al Gobernador un juicio político, que este desconoció ordenando la detención de sus miembros y la destitución del Poder Judicial.<sup>7200</sup> Fue esta arbitraria actitud la que decidió al Congreso Nacional a promulgar la intervención y designar como Comisionado al Juez Federal de Catamarca Dr. Joaquín Quiroga.<sup>7201</sup> Habiendo el Cnel. Nicolás Barros apoderándose del ánimo del Gobernador Almonacid, el partido Autonomista se dividió en 1877 en tres grupos.<sup>7202</sup>

También era práctica corriente que los presidentes, gobernadores y Ministros de Gobierno apuntaran quiénes habrían de ser los Senadores y Diputados Nacionales y Provinciales. Con respecto a Córdoba, el Diputado Nacional José Cortés Funes le había insinuado a Roca, que podía "...modificar la lista de Diputados que habían confeccionado aquí los hombres del gobierno, sin falta a deber alguno".<sup>7203</sup> Dado que esa lista era "...diversa de la convenida con Vd. [Roca] y el Dr. Avellaneda",<sup>7204</sup> Cortés Funes encontraba muy irregular que en ella figuraran "...tres enemigos declarados de esa actualidad, como son [Santiago] Cáceres, [Félix] Olmedo, y [Marcelino] Gacitúa, y otros de color indefinido con los cuales tampoco puede contar nuestro partido".<sup>7205</sup>

Luego que se libró la segunda batalla de Santa Rosa (1874), el Autonomismo se afianzó en Cuyo, con la hegemonía del círculo de los Villanueva, y el Mitrismo entró en profunda decadencia política. En San Juan, el Gral. Arredondo depuso al Gobernador Manuel J. Gómez, quien fue reemplazado por Sandalio Echavarría.<sup>7206</sup> Y para la época en que ocurrió la segunda batalla de Santa Rosa (1874), el partido del Club del Pueblo, tradicional enemigo del Mitrismo, estaba desunido, gobernando la fracción liderada por Rosauro Doncel, a la cual Don Agustín Gómez apoyaba.<sup>7207</sup> Finalmente, desde Jáchal (San Juan), en 1877, Agustín Gómez le transmitía a Roca que había confiado demasiado en el Padre Burela, pues "...lo habían puesto en relaciones con todos mis amigos y recomendándolo para que se pusieran de acuerdo con él desde mucho tiempo antes".<sup>7208</sup> Sin embargo, por un disgusto que Burela ha tenido con el Subdelegado de Jáchal Eusebio Dajorti

"...este fraile infame nos vendió entregando al contrario nuestros propios elementos, sin nosotros sospecharlo hasta última hora, y de allí resulta perdida la elección por muchos votos que sufragaron de ambos partidos".<sup>7209</sup>

### **Capítulo III-D-15    Conflictividad interna versus externa en la cuestión provincial. El caso santiagueño (1881-86)**

#### **Índice**

- O-I    Retorno de exilados o régimen de vínculos familiares cruzados.
- O-II   Inconsulta sucesión provincial y el tercer actor entre bambalinas.
- O-III   Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos como colinas estratégicas
- O-IV   Gabinetes ministeriales como válvulas de escape.
- O-V   Estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador.
- O-VI   Facciones de la coalición oficialista y mecanismos coercitivos
- O-VII   Devaneos Rochistas de un gobernador en la coyuntura electoral.
- O-VIII   Conflicto de poderes que dio pie a la Intervención Federal.
- O-IX   Régimen bancario y cuerpo gerencial opositor.
- O-X   Tercera intervención federal.
- O-XI   Formación de las élites financieras.
- O-XII   Administración de Justicia desplazada por el poder político.

#### **Introducción del capítulo III-D-15**

El abrupto fin de un prolongado período de estabilidad política bajo el mando autoritario de un clan familiar, de fiel y estrecha filiación Liberal-Mitrista, la de los Taboada, necesariamente abría en Santiago del Estero una instancia de anarquía, y en el mejor de los casos de una profunda inestabilidad en el seno de su elite política. Para paliar la misma, en el período post-Taboadista, Santiago del Estero sufrió una transición política signada por: a) un profundo proceso de deslegitimación de la elite Taboadista, de extracción Mitrista y de vínculos reforzantes; b) una faccionalización cruzada de la elite opositora (anti-Taboadista); y c) intermitentes interferencias en forma de intervenciones militares, enviadas por el poder central (Olascoaga, Cerri, Cuenca y Chavarría), mediadas por gobiernos constitucionales.<sup>7210</sup>

La materia prima que alimentó el análisis histórico acerca de Santiago del Estero -- provincia perteneciente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía política la disputaban en el período que aquí hemos de estudiar, los Autonomismos Roquista, Juarista (anti-clerical), Irigoyenista (mazorquero o Derquista) y Rochista-- nos llevó a explicar su crisis política como función inversa de la pluralidad de fracturas o desajustes pre-modernos y modernos (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados), y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política), de Ross (1995); aplicar la perspectiva psico-cultural y el proceso de sugestión mimética para la explicación de la movilización de los sentimientos de identificación, entre ellos la violencia fundacional y las conflictividades internas y externas, de Ross (1995) y de Girard (1995); e implementar las tesis del desequilibrio o desajuste en la balanza del poder; y de la combinatoria de incentivos colectivos y selectivos, de Panebianco (1990).

En el centro de la cuestión Santiagueña parece que se entrecruzaba la cuestión de la guerra de sucesión provincial con la guerra de sucesión nacional.<sup>7211</sup> Asimismo, a dicha crisis es aplicable la tesis formulada por Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña

(1995), acerca de la variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, donde un tercer actor (el gobierno federal) está colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes. También se aplican la tesis del peligro de la gestación de facciones por maximización de las utilidades, de Buchanan y Tullock (1962); y la relación entre el grado de institucionalización de las facciones y el grado de cohesión, estabilidad y organización de los grupos que actúan en su interior, de Panebianco (1988).

Esta crisis política nos han llevado a formular una serie de interrogantes, a propósito de la transición política en Santiago del Estero, en la segunda mitad del siglo XIX, tales como:

- a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía derivar en una conflictividad interna o guerra de sucesión provincial sin salida local?;
- b) ¿las conflictividades internan guardaban relación con la conflictividad externa?;
- y c) ¿las conflictividades internas podían ser arbitradas por un tercer actor externo?.

#### **O-I Retorno de exilados o régimen de vínculos familiares cruzados.**

Deslegitimado el régimen Taboadista y por consiguiente el Mitrismo, en virtud del vínculo reforzante que significó la implementación de prácticas clánicas (nepotismo), la elite dominante se reorganizó bajo un régimen de vínculos familiares cruzados.<sup>7212</sup> Es decir, regresaron los exiliados, representados en las familias de los Pinto,<sup>7213</sup> los Vieyra,<sup>7214</sup> y los Lami,<sup>7215</sup> que en opinión del Comandante Cerri, "...habían emigrado, comiendo según ellos, el duro y amargo pan del destierro".<sup>7216</sup> Desaparecida la amenaza Taboadista en la década del 80, los hombres "...del pan negro, viendo que no podían conseguir trepar arriba por méritos, trataron de hacerlo con dinero".<sup>7217</sup> Una vez elegido gobernador Pedro C. Gallo,<sup>7218</sup> y designado como Ministro de Gobierno su pariente Telasco Castellanos,<sup>7219</sup> se produjo una situación sumamente crítica, próxima a un conato revolucionario, al irse el ex Interventor Coronel Octavio Olascoaga a la Campaña del Desierto (1879) y al rechazarse la candidatura a Juez Federal de Gabriel Larsen del Castaño.<sup>7220</sup> Esta situación se produjo en parte por el exceso de incentivos selectivos puestos en juego desde la derrota del Taboadismo, de la que Gallo salió indemne con el apoyo de la facción moderada de la coalición opositora, constituída por la facción Taboadista derrotada. Pero el Ministro Telasco Castellanos "...llevado de su carácter débil e indolente",

"...no ha querido asumir la actitud que le corresponde,... pues en vez de ser él el que imprimiera una dirección conveniente a la política del Gobierno se deja llevar en todo y no opone ningún contrapeso".<sup>7221</sup>

El político de raza que era Absalón Rojas,<sup>7222</sup> le había hecho presente a Castellanos "...cual debe ser su verdadero rol en vista de sus eternas cuerpeadas".<sup>7223</sup> Castellanos era en el gobierno el verdadero representante de nuestro partido, pues

"...tenía o ha podido tener de su lado a todo lo que más vale en Santiago y al mismo Olascoaga, para de este modo presentar capital propio y hacer pesar su influencia en el Gobierno pero nada de esto hace y por el contrario se deja llevar de

odios ajenos para hostilizar a hombres [como Larsen] que pueden hacer mucho mal si se ponen de punta y aún ha pretendido dejarlo al mismo Olascoaga con quien podía y estaba en su mano marchar de perfecto acuerdo".<sup>7224</sup>

En una muy sugestiva carta que revela los mecanismos de selección de candidatos prevaleciente en ese entonces, el Gerente del Banco Nacional Rafael de la Plaza le contaba a su hermano Don Victorino, que el Gobernador Pedro C. Gallo

"...citó a varios de sus amigos y a algunos artesanos [integrantes del bajo pueblo] para una reunión en los salones de Gobierno. Concurrieron algunos empleados, su yerno [Juan Pinto], y otro, en todo diez !!! personas. Entonces dijo que no habiendo manifestación alguna popular que diera a conocer trabajos o voluntades de trabajar en la elección, él proponía como candidatos a Absalón Rojas, Napoleón Zavalía (su sobrino); Pedro 2o. Gallo, su hijo; y Dr. Dámaso Palacio. Todos dijeron muy bien, salieron con la música a festejar a los candidatos y ahí tienes la fiesta hecha".<sup>7225</sup>

Con ese motivo, el Diputado Nacional Francisco Olivera,<sup>7226</sup> refería también que dicha elección

"...se ha hecho aquí con el mayor cinismo, [pues] el Gobernador proclamó los candidatos en el salón de la Casa de Gobierno. Para este acto reunió 14 o 15 empleados y les dijo que él había formulado esa lista, pero que los presentes podían modificarla".<sup>7227</sup>

Gallo incluso dirigió circulares a los Comandantes y Jueces de Paz (que en ese entonces y hasta muy avanzado el siglo veinte fueron jueces legos, es decir no letrados),

"...bajo su firma, diciéndoles que habiendo sido acordada esa lista en una reunión numerosa de amigos, les pide le presten todo su concurso y elementos para hacerla triunfar. Muchos Jueces de Paz y algunos Comandantes han devuelto la circular considerándola vejatoria y dándole una lección de moralidad al Sr. Gobernador".<sup>7228</sup>

Para esa época, el mismo Rafael de la Plaza le escribía a su hermano anunciándole que el Gobernador Gallo ha indicado para su sucesión

"...a un Sr. [Napoleón] Zavalía [Gondra] que ha sido electo diputado al Congreso este año y que es sobrino, primo, cuñado, hermano y tuti cuanti de Gregorio Santillán [(a) "Don Goyo Suelas"] mismo".<sup>7229</sup>

Incluso Absalón Rojas, de quien siempre se pensó que por razones ideológicas era más inmune a los gobiernos de familia, le había referido a Roca tiempo antes que el único hecho grave producido en la gestión de Gallo era la destitución de dos diputados amigos,

"...el uno es primo mío [¿un Ruiz?], Coronel de la provincia, Jefe de varios Departamentos, y creo que la conferencia que tuvimos desde Tucumán con Telasco [Castellanos], impidió la separación de este Jefe y otro de igual parentesco conmigo".<sup>7230</sup>

## **O-II La inconsulta sucesión provincial y el tercer actor entre bambalinas.**

El hecho de que el Gobernador Pedro C. Gallo, apuntara el nombre de su sucesor,<sup>7231</sup> sin consultar con el Presidente de la República General Julio A. Roca, habría disgustado al propio Presidente, quien operaba como un verdadero tercer actor entre las facciones en pugna.<sup>7232</sup> Para comienzos de marzo de 1882, Gallo no contaba

"...con elementos de importancia en la actual Legislatura, pues de los ocho votos que tienen los Diputados que continúan con su mandato, es más que seguro que solo dos votos le pertenecerán con seguridad a Gallo".<sup>7233</sup>

Los candidatos a Gobernador que "...manifiestan aspiraciones desmedidas [Pancho Olivera y José A. Orgaz] no son aceptados por Don Pedro y están ya mal con él",<sup>7234</sup> y la candidatura de su yerno Juan A. Pinto, "...parece que no tendrá su apoyo, lo mismo que Pedro Vieyra que también aspira".<sup>7235</sup>

Al encontrarse sin amigos ni partido que lo apoyaran, el Gobernador Gallo estableció en 1882 en cada Departamento de campaña, según lo manifestaba el Diputado Nacional Francisco Olivera "...un sistema de opresión nunca visto y quiere a todo trance hacerse temer".<sup>7236</sup> Como ninguna persona que se estimara en algo podía acompañar a un gobernante que tal proceder observaba

"...muy pronto se encontró el Sr. Gallo con que nadie quería servirle en la Campaña y para conseguir que aceptasen los puestos de Jueces de Paz y Comisarios hizo que la Legislatura les votase sueldos y ni así ha encontrado personas honorables y decentes que le acompañen".<sup>7237</sup>

Como resultado de su desprestigio, Gallo "...ha tenido que mandar a cada Departamento personas extrañas a la localidad y con generalidad conocidas sólo por sus fechorías".<sup>7238</sup>

De esa manera Gallo se encontraba sobre un piso político extremadamente endeble. Para Manuel Gorostiaga,<sup>7239</sup> la división en la elite bien pronto "...acabará por producir una ruptura ruidosa entre [Absalón] Rojas y el ex-Gobernador Pedro Firmo Unzaga,<sup>7240</sup> que ya están chocados".<sup>7241</sup> Como en todos los casos, la división empezó por la reforma de la Constitución promovida por el joven Ministro José Nicolás Matienzo.<sup>7242</sup> Rojas no quería reformarla o por lo menos,

"...pretende postergar la reforma o la vigencia de la nueva Constitución hasta el 85, para renovar la Legislatura con la Comisión Permanente actual, compuesta en su mayoría por Rojistas. Así, podrá hacer diputados a su antojo, y mantenerlo en jaque al Gobierno, con la amenaza del juicio político".<sup>7243</sup>

Frente a la incertidumbre política provocada por la lucha de facciones donde ninguna alcanzaba a imponerse, lo más probable era que el candidato a Gobernador viniera digitado desde la Presidencia de la República. Rafael de la Plaza le revelaba en ese entonces a su hermano Victorino que había "...la firme creencia que el General [Roca] indicará el Gobernador que suceda a Gallo".<sup>7244</sup> Hecha la elección en abril de 1882, Rafael de la Plaza le manifestaba a su hermano, que "...habrá sido muy difícil que perdiera Pinto, porque [aunque] no tiene mayoría en la Legislatura tampoco la tienen los otros [Rojas, Olivera] separados".<sup>7245</sup> Como a los cuatro meses, en agosto de 1882, debía renovarse la mitad de la

Cámara y los nuevos electos habrían de ser los electores de Gobernador, "...es natural que lleven por fas o nefas [sic], amigos que respondiendo a Gallo respondan también a Pinto y entonces éste será el vencedor".<sup>7246</sup> En cuanto a Gallo, este manifestaba a sus amigos

"...que lo único que desea es dejar resguardadas sus espaldas, lo que traducen por asegurar una próxima senaturía para él y la aprobación de sus actos como Gobernante".<sup>7247</sup>

Efectivamente, la senaduría había quedado vacante al vencer el mandato del Senador Luis Frías Iramain.<sup>7248</sup> Si le garantizaban dicho puesto senatorial, Plaza aseguraba que Gallo "...entregará el bastón...al que vea más capaz de llevarlo [invernarlo] al Senado".<sup>7249</sup>

### **O-III Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos como colinas estratégicas.**

El periodismo servía de espacio donde ejercitar las artes de la intriga política. El diario oficial de Santiago (dirigido por Absalón Rojas), más afín a la política Tucumana, difundía injurias contra el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, provocando la indignación de Luis Generoso Pinto,<sup>7250</sup> para quien la candidatura de su hermano Juan era combatida "...por el sólo peligro remoto de que siguiera las inspiraciones de [Pedro] Gallo y no las suyas".<sup>7251</sup> La justicia también era un instrumento de manipulación política. Como el Juez de Primera Instancia en lo Civil,<sup>7252</sup> que presidía la Mesa Electoral de la Capital, era un joven muy celoso de su independencia, al Gobernador Gallo no se le ocurrió mejor idea que reformar la Ley Electoral, convocando a sesiones extraordinarias, para que la Mesa Electoral fuera presidida por un Juez de Paz que él pudiera manipular.<sup>7253</sup>

Amén del periodismo y la justicia, también las bancas de la Legislatura o la parlamentarización provincial oficiaba de colina estratégica. Habiéndose reunido en abril de 1882 catorce diputados que se sometían a la elección, el compromiso o Plan político contraído por la Legislatura y elaborado por los Dres. Manuel Pizarro y Manuel Gorostiaga consistía en que ningún Diputado levantara candidato a Gobernador hasta un día determinado. En ese día el candidato "...que se levante con más votos obtendrá los de todos los otros".<sup>7254</sup> Figuraban como indicados para esos puestos Luis G. Pinto y Francisco Olivera, (a) "Pancho".<sup>7255</sup> Asimismo, el plan contemplaba que se reuniera la Legislatura para conocer de las elecciones de diputados anteriores y se pidiera al Gobernador Gallo las actas. En caso de que éste se negara a entregarlas, al igual que había sucedido en Corrientes con el Gobernador Antonio Gallino,

"...lo conminan y el Gral. Roca apoya decidida y directamente la destitución y revolución. Si el día fijado hay empate de votos el Presidente de la República decide dando el nombre que a él le agrade".<sup>7256</sup>

Realizadas en Agosto las elecciones de la mitad de la Legislatura, Gallo se negó a enviar las actas y desconoció a la misma Legislatura. Este desconocimiento abría las puertas a una suspensión en el cargo por parte de la Legislatura; o a una intervención federal, pues Gallo incurría en las causales del art.6 de la Constitución Nacional al violar el régimen republicano de gobierno. La inicua maniobra de amenazar a un gobernador para que renuncie, contaba con frondosos precedentes,<sup>7257</sup> y se dio en denominar gallinicidio o gallinización, epíteto acuñado por las denuncias de *La Patria Argentina* (Buenos Aires), órgano de prensa dirigido por el periodista porteño José María Gutiérrez.<sup>7258</sup>

#### O-IV Gabinetes ministeriales como válvula de escape.

En estas ocasiones críticas, la integración de los gabinetes ministeriales, como en los regímenes parlamentarios, servían de válvula de escape a una aguda tensión política. Al verse Gallo ya destituido o cuando menos suspendido "...buscó auxilio en [José María] Corbalán y este le aconsejó cambiar ministro nombrando a alguno de los jefes de la oposición y delegar el mando en él".<sup>7259</sup> Para esta maniobra Gallo buscó a Francisco Olivera y a Jaime Vieyra y les propuso que aceptaran el Ministerio. Si bien Jaime Vieyra no quiso aceptar, Olivera sí lo hizo, extendiéndosele el nombramiento,

"...y con él en la mano se presentó en la Legislatura a contestar los cargos que se le hacían. Estos eran que pretendía alzarse con el poder [Gubernativo] y el desconocimiento a la misma Legislatura".<sup>7260</sup>

Olivera retiró la nota en la cual el Gobierno desconocía las facultades electoras de la Cámara, afirmando que las reconocía y aceptaba sus resoluciones y "...que en cuanto a las actas que antes habían sido negadas las ponía en poder de la Cámara".<sup>7261</sup> Con esta salida, Olivera ató a los legisladores al extremo de dejarlos "...sin saber que hacer, teniendo que levantar la sesión para orientar y continuar la acusación o adoptar otro expediente". Olivera tenía contraído, según afirmaba Rafael de la Plaza, un compromiso con Pinto "...para voltear a Don Pedro, compromiso publicado en un Boletín y conocido de todos".<sup>7262</sup> Después de entendido Olivera con Gallo vino aquél a la reunión de los amigos y legisladores, incluido Pinto, donde manifestó lo que acababa de hacer pidiendo al parecer consejo; "...naturalmente que le reprocharon este paso como una deslealtad".<sup>7263</sup> Es entonces que Olivera manifestó y propuso que los tres: Olivera, Pinto y Vieyra, renunciaran a sus candidaturas a Gobernador y que se eligiera otro cualquiera. Si bien Jaime Vieyra aceptó esta proposición, Pinto sostuvo "...que él no era candidato y que por consecuencia no tenía que renunciar a estas manifestaciones".<sup>7264</sup> Y Olivera dijo "...que creía un acto de patriotismo de su parte continuar en el Ministerio".<sup>7265</sup> En conclusión: rompimiento de amistades y compromisos entre Olivera y Pinto. Mientras Olivera sostenía a Gallo, Jaime Vieyra marchaba unido a Pinto, en contra de Olivera y de Gallo. Pero como Olivera había tomado conciencia que no podría sostenerse como Gobernador y que como Ministro se perdía "...ha empezado a proponer candidatos de transacción indicando otro nulo más nulo que Gallo pero que le pertenece, es un Don Víctor Beltrán".<sup>7266</sup> Arreglo éste que Pinto y Vieyra rechazaron. Rafael de la Plaza nos refiere que entonces se pensaba

"...que esta evolución es pura farsa y que Pinto y Olivera siguen unidos con Gallo, que todo es pura farsa, pero otros creen que Olivera ha faltado a su compromiso con Pinto y se ha pasado con armas y bagajes a Gallo".<sup>7267</sup>

Aunque Pinto continuaba su campaña contra Gallo

"...no quiere que llegue el caso de la intervención porque teme que le sea hostil. El quiere que Gallo renuncie o sea destituido o cuando menos suspendido para que el poder pase a manos del Presidente de la Legislatura que le pertenece y que en caso de elección de nuevo Gobernador para terminar el período actual se haga sin que tome parte el Presidente Roca por que parece que en la actual Cámara tiene mayoría sobre los demás y sacará persona que le responda para las nuevas elecciones y para la de gobernador en 1 de Noviembre".<sup>7268</sup>

En cambio, Rojas y Vieyra, que eran los dos candidatos a Gobernador que quedaban, no tenían elementos en la Legislatura para vencer a Pinto en una elección y esperaban todo de la Intervención Nacional. De esta manera trabajaban "...para que ésta [Intervención] venga, pero aún no se atreven a luchar contra Pinto porque quieren antes voltear a Gallo".<sup>7269</sup>

#### **O-V Estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador.**

Dado el casi seguro caso de que el Gobernador Gallo terminara su período, el Gerente del Banco Nacional Rafael de la Plaza se preguntaba "¿cuál de los candidatos conocidos conviene sostener?".<sup>7270</sup> Los pretendientes a la gobernación de Santiago eran: a) el cordobés Luis G. Pinto, b) Francisco Olivera, c) Napoleón Zavalía Gondra,<sup>7271</sup> d) José A. Orgaz, y e) los hermanos Pedro Vieyra Lami,<sup>7272</sup> y Jaime Vieyra Lami.<sup>7273</sup> Para el análisis de las posibilidades de cada candidato era preciso sopesar el apoyo político y económico existente detrás de cada uno. En cuanto a los Vieyra, "Pedro cederá a Jaime".<sup>7274</sup> Respecto a Olivera, a Plaza le parecía que tampoco convenía apoyarlo pues "...responde a Roca, y en caso a Irigoyen, con quien mantiene muy buenas relaciones".<sup>7275</sup> En cuanto a Luis G. Pinto, tradicional enemigo de Absalón Rojas,

"...dirige la principal Casa de Comercio de esta plaza; su firma es reputada como la mejor y en cuanto a su fortuna se la hace ascender a una suma de mucha consideración".<sup>7276</sup>

Como Pinto era cordobés, Rafael de la Plaza aseguraba que "...se encontrará apoyado por Juárez Celman".<sup>7277</sup> Era natural entonces que Pinto le prometiera a Juárez "...dejar al terminar su período, amigo que responda a su candidatura para la Presidencia".<sup>7278</sup> Pero al ser completamente resistida la candidatura Pinto, a Olivera le parecía "...que Gallo trata de entregar a los Santillán el Gobierno".<sup>7279</sup> Esta última evolución o transformismo de Gallo en la dirección del Rochismo vino a robustecer la candidatura de Olivera

"...por que he recibido nuevas adhesiones de personas que temen la vuelta de la situación [dominada por el clan Santillán] que teníamos antes de la elevación de Gallo".<sup>7280</sup>

Sin embargo, meses después, la política seguía enredada, pues "...Pinto y Olivera que eran enemigos a no oírse, están unidos hoy para voltear a Gallo. Terminado el trabajo [de voltearlo] levantará candidato la Legislatura y uno y otro esperan soplarse la dama".<sup>7281</sup>

La verdad era que nadie creía en el rompimiento de Pinto con Gallo y había quien aseguraba "...que es una farsa hecha esprofeso para engañar y llevar adelante los trabajos sin ser sentidos y sacar un Pinto de Gobernador".<sup>7282</sup> La idea no era totalmente descaminada, pues "...todos los elementos con que Gallo contaba están en la Liga con Pinto y los negocios que los dos tienen son de naturaleza a mantenerlos unidos".<sup>7283</sup> A Rafael de la Plaza le parecía que "...Olivera pierde con esta liga, porque a Pinto no quieren en el pueblo y todo lo que con él se relaciona es antipático".<sup>7284</sup> Sin embargo, la casa de Pinto era como un club, "...y allá están a toda hora los diputados y los que no son, maniobrando al parecer contra Gallo".<sup>7285</sup> Debes saber, le transmitía Rafael a su hermano, "...que los amigos que verdaderamente están con Pinto son Mitristas [Taboadistas] de la talla de Gorostiaga".<sup>7286</sup> Y según Antonino Lascano,<sup>7287</sup> en carta a Juárez Celman del mismo mes de agosto de 1882,

"...el origen de la actual oposición entre Pinto y Gallo "...es una mentida rencilla [o estratagema] fraguada entre los Pinto y Gallo, para salvar al último, quien ya se da por perdido".<sup>7288</sup>

## **O-VI Facciones de la coalición oficialista y mecanismos coercitivos.**

La división entre las facciones de la coalición oficialista, representadas por Absalón Rojas y Luis G. Pinto, era para Antonino Lascano, en Setiembre de 1882, un hecho,

"...a pesar de que las partes hacen esfuerzos inauditos para aparecer ligados. Era materialmente imposible permanecieran estrechados por una mentida amistad, hija de las conveniencias del momento, pues aspiraciones y tendencias son encontradas y opuestas, preví desde hace mucho tiempo, tendrían un desenlace nada favorable para las partes; conforme a mi pensar ha resultado, y ahora veo ya a los amigos de ayer, convertidos como por encanto en enemigos irreconciliables".<sup>7289</sup>

En su exasperación, el Gobernador Gallo ordenó al Jefe de Policía que hostilizara a Manuel Gorostiaga. Y en sus cavilaciones, Gorostiaga creía "...que estas persecuciones obedezcan al propósito de hacerme salir del país".<sup>7290</sup> Gallo temía, según Gorostiaga, que "...haga llegar hasta tí, los manejos, la conspiración que constantemente dirige contra los que llama sus amigos".<sup>7291</sup> Gallo estaba ligado con

"...compromisos de dinero a una política que aspira a sustraerse de tu influencia; para contrarrestarla, recibe continuamente agentes, que obedecen a estos planes, se ha ligado a sus enemigos para llevar adelante sus ambiciones, y él cree que yo te instruiré de cuanto pasa. Para evitarlo hace lo que hace pensando que emigraré".<sup>7292</sup>

## **O-VII Devaneos Rochistas de un gobernador en la coyuntura electoral.**

La gestión gubernativa de Gallo estuvo muy lejos de ser estable. Dicha inestabilidad casi caótica obedecía a la proximidad de las elecciones en que debía elegirse un Gobernador, que iba a operar como elector del nuevo Presidente.<sup>7293</sup> La acusación de que Gallo se había arrimado a los Taboadistas hizo que se distanciara de los hermanos Vieyra, abandonara la candidatura de Juan A. Pinto, y se arrimara a los Santillanes, cuya filiación Rochista era de pública notoriedad. Para ese entonces se rumoreaba que Gallo había intentado celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la instalación de sucursales.<sup>7294</sup> Al designar como candidato a Diputado Nacional a un sobrino rochista, Napoleón Zavalía Gondra, fue acusado de haberse divorciado de Roca para entregarse a Rocha.<sup>7295</sup> Por ello el 9 de Agosto de 1882 su Ministro de Gobierno, el Sanjuanino Mardoqueo Olmos renunció,<sup>7296</sup> y el 21 de Agosto la Legislatura santiagueña, en las mayoritarias manos de los emigrados, lo suspendió en el cargo.<sup>7297</sup> Por ese motivo asumió el mando de la provincia el Presidente de la Cámara, que era Pedro José Lami, apoyado por Luis G. Pinto y por el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman.

Al acentuarse la inestabilidad política, ésta alcanzó ribetes donde prevaleció una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo. El 30 de agosto Rafael de la Plaza,<sup>7298</sup> se retiró de Santiago del Estero

"...muy intranquilo porque la situación está bastante mala; hay jente reunida en ambos cuarteles, hablan de ataques, de esto y lo otro y francamente aunque no creo que se topen no dejo de afligirme por las criaturas".<sup>7299</sup>

También aseguraban que en Agosto de 1882 "...llegarán dos compañías del 4 de [Infantería de] Línea que vienen de Córdoba".<sup>7300</sup> Gallo, quien se hallaba padeciendo una situación muy semejante a la sufrida meses antes por el Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino, se resistía a la destitución publicando Boletines, donde decía que se entregaría a la autoridad de la Nación, "...pero que quiere dejar bien constatado que el Presidente [Roca] lo derroca".<sup>7301</sup> Habiendo entrado a la ciudad el Presidente de la Cámara Legislativa Pedro J. Lami con 200 hombres de la campaña, de filiación Taboadista (venidos a favor de Lami), le aseguraban a Plaza "...que viene más del doble de este número a sostener a Gallo".<sup>7302</sup> De todos modos si venían las fuerzas de la Nación, Plaza creía que no iba a pasar nada.

## **O-VIII      Conflicto de poderes que dio pié a la Intervención Federal.**

Este violento conflicto de poderes, entre el Gobernador y la Legislatura, que signó la segunda intervención federal del período post-Taboadista, distanció a Gallo de Luis G. Pinto, y puso el Gobierno provisoriamente en manos de este último, que era como decir en manos de Juárez Celman. Gallo pedía al Poder Ejecutivo Nacional la segunda intervención, a la que Pinto se oponía, porque en ese caso Roca designaría a Absalón Rojas.<sup>7303</sup> Aparentemente, Roca y Juárez Celman se hallaban entre sí enfrentados en la cuestión sucesoria Santiagueña.<sup>7304</sup> De todos modos, el Presidente por lo visto laudaba. Se decía también entonces que el Presidente

"...ha cambiado de candidato y que no sostiene ya a Rojas, pero otros aseguran que no hay razón que lo haga desistir de colocar a Rojas en el gobierno. Pinto sigue con su camarilla a la que parece ha amarrado bien".<sup>7305</sup>

En efecto, el Presidente había cambiado de candidato, desistiendo de apoyar a Absalón Rojas, pues el 29 de Agosto el Diputado Nacional por Córdoba Don Cleto Peña le transmitía a Juárez Celman, que

"...Roca me dijo...que Pinto había hecho mucho en esta cuestión y que era verdad que tenía mayoría en la Legislatura y lo apoyaría con gusto porque también era amigo".<sup>7306</sup>

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Nacional se habían perfilado dos proyectos antagónicos, uno el de los Senadores Tiburcio Padilla y Pablo Carrillo, apoyados por el Rochismo y los Senadores Ramón Febre y Agustín Gómez (partidarios de una intervención que restableciera la autoridad de Gallo); y el otro, el del Senador Rafael Igarzábal (apoyado por Roca), no haciendo lugar a la intervención, partidario de que sólo la Legislatura eligiera al nuevo Gobernador.<sup>7307</sup> Rechazada la intervención por el Senado Nacional, consagrado Pinto (ex-Mitrista) por la Legislatura como nuevo Gobernador, y respaldado por Manuel Gorostiaga, el 12 de Noviembre Rafael le escribía alarmado a su hermano Victorino que no estaba conforme con que

"...el partido [Mitrista] vencido en el 74, en el 80 saque la cabeza en ésta [provincia], y mucho menos que esa cabeza sea el Taboadismo [Nacionalismo liberal-mitrista]. Por mas que estos sean mis amigos personales aunque no políticos

no estoy conforme con esa cabeza porque es formidable, en las últimas elecciones hemos visto el partido bastante unido y fuerte y si esto es el comienzo de su resurrección temo que más tarde dé algún trabajo. No me afligiría que se levante en otras provincias porque en ninguna tiene el significado que aquí ni las consecuencias".<sup>7308</sup>

Con respecto al encumbramiento político de Luis G. Pinto, Rafael de la Plaza le confesaba a su hermano su perplejidad, pues "...no comprendo como el Presidente ha engañado a su amigo Rojas y ha burlado a los que confiados en sus palabras lo seguían".<sup>7309</sup> Pinto seguía sus maniobras, y según le parecía a Plaza no era Pinto sino otros, refiriéndose a Manuel Gorostiaga y la coalición opositora integrada por los Taboadistas, los que

"...a la sombra de éste y del borracho tonto de [Pedro José] Lami hacen trabajos que pueden costar caro al país. Estas jentes no trepidan en manifestar que resistirán aún con la fuerza. Pinto no es temible porque [aunque] Gobernador electo no tiene una voz a su favor, pero los que lo levantan, los que van a sostenerlo sí lo son y mucho".<sup>7310</sup>

Estos trabajos, cuestionados también por Rojas, "...no obedecen a otra cosa que a los caprichos y venganzas de los Taboadistas que han reaccionado completamente para apoyar a Lami quien no pasa de ser un instrumento inconciente y ciego".<sup>7311</sup>

Pero al igual que la coalición oficialista encabezada por el gobernador Gallo, la del Gobernador Pinto adoleció de una profunda inestabilidad. Esta anarquía alcanzaba a la campaña y a la seguridad de los colonos extranjeros. El alma del gobierno electo de Pinto, era a juicio de Rojas, la persona de Manuel Gorostiaga, quien estaba respaldada por el Taboadismo,<sup>7312</sup> y

"...no dudo que es él el que más culpa tiene de todos los atentados [contra los extranjeros] que se han cometido y siguen cometiéndose tanto en la ciudad como en la campaña".<sup>7313</sup>

Para Pinto, los que no han querido acompañarlo en las difíciles tareas de la Administración, eran refiriéndose a Rojas,

"...aquellos rebeldes obcecados que viven soñando las regalías del poder. Ellos han levantado una bandera de guerra a mi gobierno, bajo la égida de la libertad que nunca conocieron, fundando dos periódicos [La Opinión Pública redactada por Federico Alvares y Carlos M. Maldonado] que inconsecuentes y desleales nos calumnian con un cinismo y una frialdad la más estoica".<sup>7314</sup>

Rojas aseguraba que el Interventor Militar Aureliano Cuenca venía decidido a sostener sus propias pretensiones.<sup>7315</sup> Llegado Cuenca con el ejército de Línea a Santiago --en la segunda intervención militar luego de la protagonizada por el Comandante Olascoaga-- fue recibido con un banquete auspiciado por la colonia extranjera (integrada por inmigrantes árabes y agremiada en una suerte de Asociación Mutua) por cuanto el Gobierno Provincial

"...había atacado duramente a los extranjeros que habían pedido al Presidente [de la República] una pronta solución de los negocios de ésta".<sup>7316</sup>

Por algo que Plaza había oído, esta cuestión sucesoria provincial de Santiago iba siendo de mucha mayor importancia de lo que parecía, pues

"...el partido Mitrista mete el pie de un modo patente y se liga el asunto Gobernador de ésta con los negocios de Catamarca por Molina y además con la oposición vencida en Tucumán".<sup>7317</sup>

Podríamos agregar que en esta cuestión Santiagueña también se ligaban las cuestiones Entrerriana y Sanjuanina, pues los Senadores Ramón Febre y Agustín Gómez, que aspiraban a la gobernaciones de Entre Ríos y San Juan respectivamente, habían votado en el Senado la postura afín al Rochismo, partidaria de una intervención que restituyera a Gallo en el poder.<sup>7318</sup> De modo que el eventual triunfo de Pinto en las elecciones gubernativas, a juicio de Plaza, significaba "...un apoyo en Santiago para conflagrar el país formando Liga de varias provincias [Catamarca, Tucumán, Córdoba]".<sup>7319</sup> En ese momento, el Gobernador de Córdoba Juárez Celman venía construyendo su propia Liga de Gobernadores, en rivalidad con Roca, pues apoyaba: a) en Santiago a Pinto; b) en Catamarca a los Molina, que eran partidarios de Irigoyen o de Rocha; y c) en Tucumán a los Nougues, vencidos en las últimas elecciones por los Posse, los Colombres, los Gallo y los Terán.<sup>7320</sup>

## **O-IX Régimen bancario y cuerpo gerencial opositor.**

El cuerpo gerencial del Banco Nacional constituía el principal obstáculo del gobierno de Luis G. Pinto. En 1883, el Gobernador Pinto, quien a su vez dirigía la principal Casa de comercio de Santiago, le aconsejaba a Roca

"...cambiar a la mayor brevedad el Consejo Consultivo y el Gerente de la Sucursal del Banco Nacional, pues aquél está representado por [Francisco] Olivera y [Mariano] Santillán, y aunque el Gerente [Sr. Voget] tiene alguna relación conmigo, es cuñado de Olivera y por consiguiente el Banco tiene sus fondos a disposición de nuestros enemigos políticos, que los usan en perjuicio de nuestra administración".<sup>7321</sup>

Un par de meses después, en Abril de 1883, el mismo Pinto insistía ante Roca que la mala voluntad del Banco Nacional

"...para conmigo y todos los amigos políticos por mas que la responsabilidad supere a los créditos que se traten de abrir, mientras que con los parciales de Olivera se procede en sentido contrario. Estos tiene créditos ilimitados a pesar de no tener responsabilidad de ningún género".<sup>7322</sup>

Las calumnias y los infundios promovidos por Gorostiaga llovieron sobre Luis G. Pinto, pese a la defensa que Juárez Celman intentó de su gobierno.<sup>7323</sup> Mientras Pinto se justificaba ante Roca, considerando de su deber haber separado de su lado a un Ministro Gorostiagista, es decir Taboadista o Mitrista,

"...que minaba mi Gobierno, traicionando a los amigos, pues lejos de tratar de disuadir a Gorostiaga de su temeraria empresa, se unió a él en el misterio y cooperaba a robustecerlo en su intento",<sup>7324</sup>

Gorostiaga acusaba a Pinto de malversaciones a los caudales públicos,<sup>7325</sup> y de saqueos de tierras.<sup>7326</sup>

### **O-X Tercer intervención federal.**

Como consecuencia de las acusaciones de malversación, el Gobernador Pinto fue desplazado y la provincia intervenida por tercera vez en Julio de 1883, confiándosele al Comisionado Nacional y Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Isaac M. Chavarría.<sup>7327</sup> Mientras la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, compuesta por los Diputados Lahitte, Gallo y Zeballos, estuvo por la aprobación del proyecto del Senado, los Diputados Peña y Chavarría estuvieron en contra.<sup>7328</sup> Para agosto de 1883, a juicio del afamado criminalista santiagueño Eusebio Gómez, los circulillos

"...que con denominaciones personales de éste o aquel ambicioso ridículo quieren hacer patrimonio de los destinos de aquella provincia, se dividieron más y más a la llegada del Dr. Chavarría".<sup>7329</sup>

Rojas invocando amistad con el Gral. Roca, y Gorostiaga alegando parentesco,

"...fusionaron en un mismo propósito, produciendo con esta fusión la dispersión en sus filas; y en cuanto a Olivera y los suyos entiendo que buscan a Pinto, intentando una amalgama que tal vez sería conveniente operar, desde que producida la situación actual conceptúo imperioso hacer alguna concesión en obsequio a nuestros mismos designios".<sup>7330</sup>

Esta tercera intervención, la de Chavarría, estaba entregada a la facción dirigida por Rojas y hostilizaba al partido de Pinto.<sup>7331</sup> Pero a partir de fines de Octubre de 1883, Chavarría "...ha vuelto a su habitual reserva".<sup>7332</sup> Por el contrario, Absalón Rojas, tradicional enemigo de Pinto, "...no se separa un sólo momento de él [Chavarría] ni de día ni de noche, está más pegado que los mismos brazos al cuerpo".<sup>7333</sup> Dicha intimidad y la reserva que Chavarría cultivaba le hicieron pensar a Plaza "...que marchan de acuerdo y que el verdadero candidato es Rojas".<sup>7334</sup> Este Interventor, azuzado por los violentos sucesos ocurridos en los pueblos de Choya y Robles, y en medio de rumores de prisiones, llamó a elecciones de Diputados electores de Gobernador y de legisladores.<sup>7335</sup> A siete días de la elección, todo hacía presumir para Plaza, "...que resultará Rojas, [pues] todos los nombramientos que se han hecho hasta hoy son de miembros de su partido aquí y en la campaña".<sup>7336</sup> No había duda que para que Chavarría resultara exitoso en su gestión interventora debía forzosamente "...valerse de uno de los círculos del que le inspire más confianza y que es indudable que el de Rojas ha de ser preferido en ese sentido".<sup>7337</sup> Como cierre de campaña "...ayer hubo una especie de manifestación a favor de Rojas, algunos de sus amigos salieron a caballo con él vivándolo por las calles".<sup>7338</sup> A un día de la elección

"...se asegura que no será Rojas y se indican dos nombres. El uno [Víctor Beltrán] es un Cesteá (sic) que no sabe ni firmar. Cesteá en toda la extensión de la palabra. El otro [Don Pedro Firmo Unzaga] aunque mas instruido, es un pobre hombre pero buen hombre, satisfará más los deseos".<sup>7339</sup>

Dos días después, según D. Rafael

"...parece que ya ha habido una especie de quiebra entre Chavarría y Rojas, que el primero le ha dicho decididamente que no es él el candidato del Presidente sino [José A.] Orgáz, a lo que parece que esto ha traído algún enfriamiento entre ellos".<sup>7340</sup>

Contaba Plaza que a causa de estas cosas "...se han reunido ayer los diputados Rojistas y han tenido una pelotera negándose todos ellos a dar su voto por otro que no sea Rojas".<sup>7341</sup> Se anunciaba como cosa resuelta que sería elegido Don José A. Orgáz, el cual para Plaza era "...un bárbaro, muy bárbaro gracias a Dios, pero manequí de Juárez Celman".<sup>7342</sup> El caso era que, para Plaza,

"...la elección de Orgáz no satisfará a nadie porque no es bien querido y no tiene vínculos ni nada. Desagradará más que el mismo Pinto y mucho mas desde que se aperciban que es por y para Juárez Celman".<sup>7343</sup>

Finalmente, Pedro Firmo Unzaga triunfó en el Colegio Electoral en Octubre de 1883, consagrándose Gobernador,<sup>7344</sup> fuertemente apoyado por los electores del entonces Senador Nacional Absalón Rojas, y Juárez Celman terminó contando con los Electores de Santiago.<sup>7345</sup> En cuanto a las Diputaciones, el Presidente Roca era presionado por los hermanos Vieyra para ser designados Diputados Nacionales.<sup>7346</sup>

Para 1884, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le confiaba a su amigo Roca sus recelos respecto al clero pues

"...desde hace algunos días se agitan mucho aquí los clérigos y se ocupan en organizar asociaciones para sus fines que indudablemente son políticos mas que religiosos a juzgar por los que llevan la iniciativa y los que los ayudan".<sup>7347</sup>

Rojas manifestaba no saber hasta donde eran los curas capaces de llegar pero "...si no los dejamos hacer su propaganda como en Catamarca, no avanzarán mucho".<sup>7348</sup> El pretexto invocado por los curas para hostilizar al gobierno de Santiago era

"...de que queremos reformar la Constitución para establecer en ella cláusulas contrarias a la religión porque somos herejes, lo cual es fácil que hagan creer de Matienzo porque son conocidas sus ideas liberales".<sup>7349</sup>

En mayo de 1884, la política Santiagueña se hallaba dividida en tres facciones: "Rojas, Gorostiaga y Olivera son los Jefes de cada una de ellas".<sup>7350</sup> Con motivo de un conflicto con el Jefe de Policía (un tal Mazza), quien solicitó el juicio político del Gobernador, Unzaga fué suspendido.<sup>7351</sup> Alegándose para ello su enfermedad, se nombró en su reemplazo, en 1884, al Vice-Gobernador Don Sofanor de la Silva,<sup>7352</sup> no sin que el conflicto llegara a la Suprema Corte Provincial (que fue juzgada por apoyar al Gobernador) y al mismo parlamento nacional, quien a la postre rechazó el pedido de intervención.<sup>7353</sup> Pero enseguida la armonía entre Rojas y el Gobernador Silva,<sup>7354</sup> comenzó a alterarse y no era aventurado creer "...que muy luego se rompan las hostilidades".<sup>7355</sup> Un primo de Rojas, de apellido Ruiz, y persona de confianza de Rojas, decía en un café, según apuntaba Pinto, "...que ayer llevaron al Gobierno a Unzaga, creyéndolo leal y que muy luego se les separó, que después lo han llevado a Silva, y que ya tenían que estar defendiéndose".<sup>7356</sup> B. Saravia le explicaba a Rafael Ruiz de los Llanos que la inestable situación política de Santiago obedecía a su artificialidad, es decir "...algo como un castillo de naipes, sostenida sólo por la influencia moral del Poder Central".<sup>7357</sup>

## **O-XI Formación de las elites financieras.**

Las autoridades centrales tenían también la última palabra en la formación de las elites financieras. En Septiembre de 1884, el Gobernador Pinto le revelaba a Juárez Celman que Absalón Rojas trabajaba activamente "...por hacer saltar al Gerente de esta sucursal del Banco Nacional para tomarse por completo el Banco pues ya tiene el Consejo consultivo".<sup>7358</sup> Cuatro meses después, en enero de 1885, el Ministro de Hacienda de la Nación Dr. Wenceslao Pacheco,<sup>7359</sup> no aceptó el candidato propuesto por Rojas para Gerente del Banco. Este último le sugirió nombrar a su concuñado Martín Posse o a su cuñado Octavio Sosa.<sup>7360</sup> Finalmente, nombrados este último y Cayetano Carbonell,<sup>7361</sup> para el Rochista Félix Cordero el Banco "...apreta a todo Rochista, nuestra firma es abiertamente rechazada de manera que no podemos servir ya a nadie".<sup>7362</sup> Diariamente, dice Cordero, "...nos hacen muchos amigos pedidos para atender estas exigencias que los coloca en condiciones horribles".<sup>7363</sup> Para ese entonces, el periódico oficial El País, órgano del Gobernador Sofanor de la Silva, de quien también se sospechaba Rochismo, no lo defendía al Gobernador de Córdoba Juárez Celman de los ataques de los enemigos Rochistas y daba "...cabida a correspondencia injuriosa hacia Vd.", proveniente de La Reforma de Salta.<sup>7364</sup> Y el Senador Nacional Absalón Rojas le sugería a Roca la posibilidad de que en Febrero de 1885 se produjera un motín, pues a Rocha

"...le conviene cualquier alarma y al fin y al cabo puede exigirles que hagan cualquier bochinche para no perder del todo su plata o mejor dicho la plata del Banco de la Provincia, de ese Banco que es necesario quitarles como se quita el arma de fuego de manos de un muchacho travieso y que hicimos mal en no quitarles a tiempo".<sup>7365</sup>

## **O-XII Administración de Justicia desplazada por el poder político.**

El Gobernador Sofanor de la Silva prolongó su mandato hasta Octubre de 1886,<sup>7366</sup> sucediéndolo en el cargo ahora sí D. Absalón Rojas.<sup>7367</sup> Una vez designado Rojas Gobernador, la anarquía en la Administración de Justicia fue el primer escollo que tuvo que afrontar. En 1885, Rojas quiso deshacerse en el Foro "...de la 'inmundicia' que tuvo que manejar por necesidad".<sup>7368</sup> Las desmedidas pretensiones manifestadas por los hermanos Benjamín y Dámaso Jiménez, Ministros del Superior Tribunal de Justicia, le ofrecieron a Rojas la excusa para "...arrojarlos a la calle porque no habían hecho sino desacreditarlo a él y a la situación de la provincia".<sup>7369</sup>

En conclusión, la crisis política de Santiago del Estero, a semejanza de lo ocurrido en Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador Iriondo, y en Entre Ríos con el Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder discrecional y arbitrador del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. El Presidente proponía candidatos a Gobernador y también incidía en la composición de las listas de Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era interpelado por las distintas facciones políticas, intereses económicos, colectividades extranjeras y factores de poder. La breve historia de Santiago del Estero aquí relatada también indica como un Presidente de la República ve mermado

su poder arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento de su mandato, al extremo de tener que negociar con su eventual sucesor las candidaturas de los gobernadores en juego.

### Capítulo III-D-16.- **Competitividad inter-oligárquica y abuso de la plebe (1884-86)**

#### **Índice**

- P-I.- Continuidad del Juarismo frente a la discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el Irigoyenismo o Bernardismo. Los casos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja (1884-86).
- P-II Ruptura del equilibrio político.
- P-III Cuestión sucesoria provincial. Los casos de Tucumán y de Jujuy.
- P-IV Estrategias políticas Rochistas.
- P-V Manipulación de los Club de Obreros o Gremios de Artesanos
- P-VI Neutralidad política de los gobernadores.
- P-VII Fragmentación de la elite política. El caso de Catamarca.
- P-VIII División del Autonomismo. El caso de La Rioja.

#### **P-I.- La continuidad del Juarismo frente a la discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el Irigoyenismo o Bernardismo. Los casos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja (1884-86).**

No obstante el proceso de oligarquización que se dio en la década del 60 y 70, Gallo (1984) observó con acierto que los gobiernos de familia o la política de círculo no habían sido patrimonio excluyente de la facción liberal-Mitrista gobernante, sino que también encontraban su contrapartida en las grandes familias de la dirigencia autonomista. Sin embargo, en cuanto a los miembros de las elites de las provincias periféricas, a menos que fueren talentosos y capaces, era improbable que obtuvieran pertenencia o ingresaran a la elite nacional.<sup>7370</sup> En otras palabras, sólo los miembros de las oligarquías de aquellas provincias o estados incorporados a una coalición política oficialista denominada Liga de Gobernadores, cuya expansión se hallaba subordinadamente asociada a la expansión del poder central, podían acceder a la oligarquía nacional. Fue esta peculiar constitución -- mediante lo que Panebianco (1988) denomina difusión territorial-- la que signó el futuro del conservadorismo argentino y que llevó a algunos autores a denominarlo "defecto genético".<sup>7371</sup>

La tesis de la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas o genéticas (étnicas, lingüísticas, geográficas, religiosas y estamentales), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (culturales: éticas y estéticas), originada en la moderna disciplina de la Ciencia Política, formulada por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995), también alcanza a la historia política.<sup>7372</sup> Asimismo, el modelo de Ross (1985, 1995), engendrado en la antropología política, formuló la tesis del grado de conflictividad en una sociedad como función inversa a la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados); y como función directa de la intensidad de su desarrollo económico, político y social (teoría de la complejidad política). Por último, para el modelo de Walt (1987), originado en la moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, cuanto mayor era la

asimetría o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.<sup>7373</sup> Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar la amenaza u oposición que enfrentaban. A medida que aumentaba la capacidad relativa de un partido, crecía su habilidad para disuadir o derrotar por sí mismo la amenaza. Por el contrario, a medida que la asimetría o capacidad relativa de un partido disminuía, su valor como aliado o disuasivo declinaba, estimulándolo a concretar coaliciones.<sup>7374</sup>

Las sucesivas derrotas militares de los Liberalismos Mitrista y Tejedorista hizo de los triunfos militares del Autonomismo victorias políticas que encerraban en sí mismas su propia crisis. En ese sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes:

- a) ¿puede afirmarse, tal como lo hace Waisman (1987), que el medio siglo que corre desde la Federalización de Buenos Aires (1880) hasta la Revolución del 30 fué de una democracia liberal en relativa estabilidad y expansión, y que su auge fué real y verdadero y no ficticio?;
- b) el despertar o surgimiento de una nueva fractura política, expresada en facciones políticas tales como los Autonomismos Irigoyenista y Rochista, obedeció a:
  - 1) ¿la ruptura, desajuste o transición política por colapso que se registró en la Revolución del 80?;
  - 2) ¿al agotamiento o extinción de la fractura política previa o vacío político dejado por la derrota de los Liberalismos Mitrista y Tejedorista?;
  - 3) ¿al extremo personalismo de la política oligárquica o de notables?;
  - 4) ¿o al apoyo declarado a favor del Juarismo por parte del oficialismo Roquista?
- c) ¿la coalición del Irigoyenismo con el Rochismo garantizaba por sí solo la derrota del oficialismo Roquista?;
- d) ¿qué rol jugó en el crecimiento y posibilidades políticas del Rochismo la amenaza armada, la compra-venta de votos mediante el crédito bancario, y la moral evolucionista o transformista en política?;
- e) ¿guardaban semejanza los Autonomismos de las distintas provincias?;
- f) ¿en qué se diferenciaban los Autonomismos Tucumano, Salteño, Santiagueño y Sanjuanino del Autonomismo Cordobés?;
- g) ¿porqué el Autonomismo Tucumano volcó su apoyo al Irigoyenismo o Bernardismo y el Autonomismo Cordobés al Juarismo?;
- h) ¿que rol jugó el Juarismo en estas circunstancias?;
- e i) ¿el Juarismo cerró siempre filas en torno al Roquismo?.

## **P-II La ruptura del equilibrio político.**

Con la liquidación de la política de la Conciliación (1877-80), la derrota del Gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor (1880), y la consagración del Gral. Roca en la presidencia de la Nación, se intervino la Provincia de Buenos Aires y se fundó el Partido Autonomista Nacional (PAN). Esta fundación se consolidó con una fusión o coalición, formada por el Autonomismo Alsinista conciliador y los Autonomismos Avellaneditas no conciliadores.<sup>7375</sup> Sin embargo, a esta fusión no adhirieron los autonomismos Alsinistas enemigos de la Conciliación (Alem y del Valle).<sup>7376</sup>

Pero el nuevo equilibrio o ajuste político fue de breve duración. De los actores que entonces tallaban en la balanza del poder político del sistema sub-continental de la Cuenca del Plata, sólo tres de ellos jugaban de árbitros: el Presidente Roca, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Dardo Rocha, y el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman. En vísperas de la sucesión presidencial de Roca, los candidatos naturales a la presidencia surgidos de las filas del PAN fueron: a) el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Bernardo de Irigoyen, que se había incorporado al PAN después del 80; b) el Ministro de Guerra y Marina Benjamín Victorica; y c) el ex-Gobernador de Buenos Aires y entonces Senador Nacional Dardo Rocha. Pero cuando Roca decidió volcar el apoyo oficial para la candidatura presidencial a favor de su concuñado el Gobernador de Córdoba Juárez Celman, se produjo una exaceración de los personalismos o liderazgos latentes y una consiguiente crisis de gabinete, de la cual resultaron renunciando ambos el Ministro de Relaciones Exteriores (Irigoyen) y el de Guerra (Victorica).<sup>7377</sup> El desaire personal que la decisión presidencial significó para Rocha, le trajo al Presidente Roca un fuerte costo político. El Rochismo entró a movilizar a sus huestes en todo el interior del país y a buscar aliados para reforzar su coalición, incluso en la vecina República Oriental del Uruguay.<sup>7378</sup>

### **P-III La cuestión sucesoria provincial. Los casos de Tucumán y de Jujuy.**

La cuestión sucesoria provincial acaparaba toda la atención de la administración de turno, y más aún cuando estaba en juego la cuestión presidencial o nacional. En Tucumán, perteneciente al subconjunto político del noroeste y cuya primacía se la disputaban los Autonomismos Juarista, Rochista e Irigoyenista, la elite se encontraba inmersa en intensos vínculos cruzados y fracturada o desajustada por la predominante incidencia de un factor pre-moderno: el parentesco, en desmedro de otros factores;<sup>7379</sup> y en medio de una realidad nacional compleja donde esta conflictividad interna se hallaba también correlacionada con una conflictividad política externa, disputada entre el Autonomismo Cordobés (Juarismo) y el Liberalismo Mitrista.<sup>7380</sup>

El Autonomismo estaba constituido entonces, cuando se trataba de elegir herederos en la sucesión provincial, por una sumatoria de clanes familiares unidos contra el Liberalismo Mitrista pero crudamente enfrentados entre sí, al extremo de excluirse mutuamente. A diferencia del partido Autonomista de Córdoba, que Juárez Celman dirigía con mano de hierro, y que según el Gobernador Miguel M. Nougués, (a) "Tres Papas",<sup>7381</sup> "...es un verdadero partido, que tiene disciplina y que Vd. como Jefe de él se encuentra en aptitud de hacer prevalecer en él con más eficacia sus indicaciones",<sup>7382</sup> en el Autonomismo Tucumano, una verdadera confederación de clanes familiares, el mismo gobernador Nougués se veía precisado a "...no romper con las fracciones en que está dividido".<sup>7383</sup> En verdad, esta realidad no era solo patrimonio de Tucumán, pues en dicha situación clánica y estructura social de vínculos cruzados se hallaban la mayoría de las provincias argentinas.<sup>7384</sup>

A propósito de la guerra de sucesión provincial, desde Tucumán, el Gobernador Nougues le confiaba a su correligionario el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman que le preocupaba "...la designación de la persona que me sucederá en el Gobierno. Esta tiene que ser una persona bien segura para Roca y debe responder a la situación actual de la Provincia".<sup>7385</sup> Nougues tenía previsto la candidatura a Gobernador del caudillo de Lules Emidio Posse,<sup>7386</sup> primo hermano de Pepe Posse,<sup>7387</sup> pero "...en vista de dificultades que contra mis cálculos se me va presentando, me voy persuadiendo que es imposible".<sup>7388</sup> El ex-Gobernador Domingo Martínez Muñecas,<sup>7389</sup> le manifestaba a Nougues que si viese que

"...la candidatura de Posse contase con una base de opinión él [Muñecas] trabajaría por ella pero que si ésta no cuenta con más concurso que con Don José Posse y sus sobrinos Enrique y Simón [Posse Méndez],<sup>7390</sup> nada haría porque comprende que nada se podría hacer".<sup>7391</sup>

Y ante la presión de Roca para que fuera elegido Diputado su amigo Benjamín Posse,<sup>7392</sup> el Gobernador Nougues le confiaba a Roca que para levantar la candidatura de Benjamín Posse

"...tendría que romper con los amigos leales que tengo y que son víctimas de los ataques de **La Razón** [donde escribía Benjamín Posse],...buscando en cambio el consenso de Don José [Posse] y los dos muchachos [Enrique y Simón Posse Méndez] que lo acompañan que no cuentan con más caudal que el de su insolencia en la prensa".<sup>7393</sup>

Desestimada su candidatura, el despechado Benjamín Posse le evocaba a Roca que "...con una palabra de Vd. (que aún no era Presidente) se hizo Diputado [por Tucumán] a Marco Avellaneda,<sup>7394</sup> a pesar de todas las repugnancias de güelfos y gibelinos".<sup>7395</sup> Y ahora, Benjamín Posse advertía que la ley era enviar al Congreso al primo hermano del ex-Presidente Avellaneda, Agustín de la Vega,<sup>7396</sup>

"...que apuntarán hacia donde Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más favorable y más honroso para ellos, no servirán para nada cuando se presente una situación un tanto embarazosa, en que sea necesario poner a prueba la inteligencia o el temple de alma de cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que considero inevitable) y no tengan razón de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un desencanto prematuro".<sup>7397</sup>

También Pepe Posse había pretendido en el pasado que su primo Don Emidio Posse impusiese al Gobernador Martínez Muñecas su propia candidatura a Diputado Nacional.<sup>7398</sup> Pero Don Emidio

"...a pesar de su parentesco y amistad con éste no se atrevió, reconociendo que tal medida sería lo más impolítico para el Gobierno pues se echaría sobre sus hombros una montaña de odios y de resistencias".<sup>7399</sup>

En 1881, el Gobernador Nougues le transmitía a Roca que Pepe Posse, "...no puede contar ni con su familia que está profundamente dividida".<sup>7400</sup> En efecto, el propio Pepe Posse no dejaba de reconocerlo.<sup>7401</sup> En las elecciones legislativas de 1880, Pepe Posse le relataba a Roca que

"...no ha habido más Posse que me acompañe y con buen número de votos, que Emidio [Posse Talavera], los demás [Wenceslao, Juan, Benjamín?] han estado en contra los unos, con medio cuerpo en cada partido algunos, y el resto metido debajo de la cama hasta que ha pasado la tormenta".<sup>7402</sup>

Asimismo, con respecto a Pepe Posse, el Gobernador Nougués le confiaba al Presidente Roca, en 1881, que el Colegio Nacional, dirigido por el Rector José Posse, era

"...el único asilo de una oposición ciega, sostenida no en nombre de principios sino solo de pasiones mezquinas, oposición que no tiene otro fin que combatir y tratar de destruir la situación actual".<sup>7403</sup>

Y en las elecciones de 1881, el Gobernador Nougués le manifestó a Juárez Celman que "...dos Posse [Benjamín y Emidio] no pueden resultar en una elección de dos Diputados".<sup>7404</sup> Benjamín Posse era para Absalón Rojas un "...tipo inteligente pero medio loco...Debido a su carácter discolo ha perdido aquí completamente en la opinión, de tal modo que puede servir muy poco a mi partido".<sup>7405</sup> Como réplica a Nougués, Benjamín Posse le pedía a Roca que le hiciera el favor

"...de convenir conmigo en que la mala impresión producida por tres Vegas, o tres Teranes, o tres cualquier cosa, sacados diputados de una hornada, no sería capaz de conmover en lo mínimo los fundamentos de su Gobierno; ni el hecho sería mirado por Vd. mismo sino como un detalle insignificante, hijo de la casualidad mas que de la intención, e indigno de llamar la atención de un hombre serio. Pero dos Posse...ah! eso no! es menester suprimir uno!".<sup>7406</sup>

Para ese entonces, el prestigio del Gobernador Nougués --que había contado en el pasado con el concurso de todos los gremios artesanales que eran entonces parte de la plebe-- se había deteriorado por haberse opuesto, en su afán anti-Rochista, a la fundación de la sucursal del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires.<sup>7407</sup> Nougués se lamentaba ante Absalón Rojas no haber resuelto quienes habrían de ser los favorecidos en la distribución de los incentivos selectivos más ambicionados, los simbólicos o de status (candidaturas a Diputados Nacionales), pues "...no sabía como hacer para conciliar las aspiraciones de Emidio Posse, Terán, [Agustín de la] Vega, Luis Aráoz y otros que me nombró pero de talla inferior".<sup>7408</sup> Asimismo, el propio Gobernador Nougués, sin duda influido por los nutridos antecedentes negativos experimentados por el nepotismo del clan Posse, creía en ese entonces que miembros de su propia familia, la de los Nougués, "...no deben ir al Congreso, aunque se hallan sacrificado en favor del partido que ha prevalecido".<sup>7409</sup>

No obstante la digna conducta de Nougués en ese entonces, su sucesor Benjamín Paz,<sup>7410</sup> se destacó por una actitud opuesta. De los veintidos (22) Diputados con que contaba la Legislatura, *La Patria Argentina* (Buenos Aires) denunciaba en abril de 1883 que más de la mitad, trece (13) Diputados, eran parientes del Gobernador o del Ministro.<sup>7411</sup> Para 1884, se produce la reforma de la Constitución de 1856 --similar a las resueltas por Salta, Catamarca y Santa Fé en la década del 70-- en la cual se adopta el el Colegio Electoral, independiente de la Legislatura, que reforma la relación entre la condición de legislador y la de elector de Gobernador; el sistema bicameral, que permite a una cámara ser instancia acusadora y a la otra judicial; y la prolongación del mandato gubernativo de dos a tres años.<sup>7412</sup> Y para fines de Diciembre de 1885, vigente la Ley 759,

que disponía para toda elección nacional la obligación de hacer previamente la inscripción en el Registro Cívico Nacional,<sup>7413</sup> y su correspondiente publicidad, que era un derecho garantizado por la Constitución Nacional, en Monteros, una localidad de Tucumán, Juan Fuentes le confesaba a Carlos Fauvety, que ya no había esperanzas de que publiquen el Registro Cívico, y la razón de ello era que "...el mismo Secretario y Juez de la Mesa están en todas las series, es decir cuatro veces".<sup>7414</sup> Y el Coronel Lídoro Quinteros le advertía al rochista Luis del Carril, a los efectos de vencer en los comicios, que

"...conviene apoderarse de la Junta insaculadora, cosa que se obtendrá por el nombramiento del Juez Federal y por medio del Presidente de la Cámara de Justicia que es el Interventor Nacional del Banco Muñoz, el Dr. Oliva".<sup>7415</sup>

En cuanto al llamado partido Liberal, se componía en 1883, a juicio de Eliseo Cantón,<sup>7416</sup> de

"...cuatro fracciones o familias que en épocas anteriores se han unido para hacer la guerra al que era un estorbo a sus ambiciones, para pelearse entre ellos después por la macana [arma indígena] si conseguían derribarlo".<sup>7417</sup>

Y en opinión del político tucumano Gregorio Zavaleta,<sup>7418</sup> en Tucumán se reproducía el escenario político de la metrópoli, pues estaba dividida en las tres facciones en que estaba dividida la política nacional: la

"...del Dr. Irigoyen, la de Juárez y la de Rocha. Del primero [Irigoyen] son los situacionistas, una parte [Paz, Méndez, Gallo]; la otra parte [Juarista] (dos Padillas [José e Isaías], un Colombres, un Alurralde, y tres Nougés y un Posse [Benjamín]); los demás, o todo...Rochistas, inclusive los Diputados Padillas, Tiburcio y Angel".<sup>7419</sup>

En cuanto al Autonomismo Rochista, en 1885, el periodista santiagueño Carlos M. Maldonado,<sup>7420</sup> que oficiaba de Secretario Privado de Dardo Rocha, y que en Tucumán había asumido la dirección política de *La Razón*,<sup>7421</sup> le confesaba a éste que "...estoy en relación íntima con un alto empleado del telégrafo que me pone al corriente de todo cuanto pasa".<sup>7422</sup> Y cinco días más tarde, le comunicaba que Luis del Carril,<sup>7423</sup> "...dio instrucciones de ponerse completamente a mi disposición, a la persona que él tenía en el telégrafo [Colombres]."<sup>7424</sup> Esa persona, Colombres, era "...la misma que antes que Carril viniera ni supiera nada, ya estaba en relaciones conmigo, y que me había dado las copias que le mandé a Vd. y otras que conservo en mi poder reservadas".<sup>7425</sup> Con razón, Barraquero (1926) denunciaba entonces la censura telegráfica al extremo de expresar con elocuencia que

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".<sup>7426</sup>

Esta situación alcanzó su máximo grado de censura en Junio de 1886, cuando al decir de José Fernández López, los telegramas del Senador Nacional Francisco J. Ortiz, enviados desde Salta y dirigidos al Presidente Juárez, fueron robados "...como los ganados de la Pampa por los malones de los beduinos políticos".<sup>7427</sup> El ex-Ministro Eduardo Wilde le contaba a Roca, que había renunciado al Ministerio

"...por la forma descortés y hasta ofensiva que usaba Juárez en sus telegramas, tomando pretesto en todo hasta en mentiras y en violaciones de la correspondencia telegráfica".<sup>7428</sup>

Y con respecto al Autonomismo Irigoyenista o Bernardismo (mazorqueros o Derquistas), el Juarista José V. García,<sup>7429</sup> le informaba al Gobernador Juárez Celman en 1885, que el ex-Diputado Nacional Delfín Gallo,<sup>7430</sup> "...se ha puesto a la cabeza del Comité Irigoyenista en la Capital".<sup>7431</sup> Estaba claro para García que el Partido Autonomista Nacional (PAN) de Tucumán

"...está resuelto a dar sus votos por el Dr. Irigoyen, o a evolucionar con otros en contra de Vd. y esto sin la venia ni escuchar la palabra del Patriarca [Miguel M.] Nougués que debiera colgar un cingulo más largo que el que reza el Padre [Juan Capistrano] Tisera".<sup>7432</sup>

Dadas estas circunstancias, el futuro Intendente de Tucumán José Padilla,<sup>7433</sup> que también incursionaba en las lides periodísticas, entendía como "...verdaderamente prudente y ocasionada", la indicación que hizo el Gobernador de Córdoba Juárez Celman a Silvano Bores, (a) "El Zorzal",<sup>7434</sup>

"...para que temple un poco la energía [opositora] de nuestro diario [*El Deber*] contra los situacionistas y para que use menos galanterías con los Rochistas".<sup>7435</sup>

Pero Padilla creía "...haber descubierto en ello algo que me demuestra que Vd. no ha compulsado detenidamente la situación de Tucumán".<sup>7436</sup> Y el Dr. Salustiano Zavalía,<sup>7437</sup> le anunciaba equivocadamente a Juárez Celman en 1886, que con motivo de la renuncia del Ministro del Interior Benjamín Paz, y el retiro de la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen,

"...Tucumán se plegará nuevamente al partido, del cual nunca se ha considerado desligado. Santa Fé supongo hará lo mismo, en cuyo caso quedaría solo como oposición Buenos Aires y Salta".<sup>7438</sup>

En 1885, el Autonomismo Juarista Tucumano se hallaba liderado por el patriarca Miguel M. Nougués,<sup>7439</sup> a quien se le ocurrió

"...que era lo bastante que él hablara a solas con el Jefe de los situacionistas y esperar su contestación cuando el quisiera dársela. Pobre Nougués, como se le reirá el Dr. [Benjamín] Paz y [Santiago] Gallo [mazorqueros o Irigoyenistas]".<sup>7440</sup>

Y en 1886, la gente del pueblo, que había sufrido toda clase de persecuciones por el sólo hecho de ser Rochistas, estaban a juicio de Juan B. Lacroix,<sup>7441</sup>

"...alucinados con las ofertas que los Juaristas les hacen de cambiar esta situación, los esplotan con la misma obra de la fusión, los alagan con dineros, obra tan fácil en nuestras masas, quienes esperan con ansiedad el día de una elección para embriagarse y disponer de algunos pesos de las partidas que los llevan a la lucha".<sup>7442</sup>

Los Juaristas les dicen que

"...ellos son también liberales y que para vencer a los mazorqueros [Irigoyenistas] es lo mismo ir con los Rochistas que con los Juaristas, mucho más cuando nosotros nos abstenemos, dejándoles en libertad de vengarse de sus enemigos radicales".<sup>7443</sup>

Todo esto hacía que los Juaristas se encontraran "...tan briosos y convertidos en un partido respetable cuando ayer andaban tan diminutos y cabizbajos".<sup>7444</sup> Para entonces, merced a la intercesión entre otros de Emidio Posse, su hermano Juan fue electo Gobernador de Tucumán.<sup>7445</sup>

En aquellas otras provincias subordinadas, que no estaban asociadas a la expansión del poder central como lo estaba Tucumán, la lucha política se hacía cada vez más cruda y excedía el marco puramente clánico. En Jujuy, también perteneciente al subconjunto político del noroeste, donde la hegemonía política se la disputaban autoridades centrales (el Autonomismo Cordobés [Juarista] y el Autonomismo Bonaerense [Rochista]), la filiación Rochista dejó de ser algo gratuito. La unión en Jujuy de los partidos Barcenista,<sup>7446</sup> y Conspícuo,<sup>7447</sup> mediante la cual se derrotó al Gobernador Martín Torino,<sup>7448</sup> estaba haciendo agua. El 8 de Febrero de 1881 "...hubo de estallar una revolución de los Barcenistas en contra de sus aliados [Conspícuos] a objeto de derrocar el actual gobierno [Plácido Sánchez de Bustamante]".<sup>7449</sup> Los Barcenistas tenían mayoría en la Legislatura, y por ello reclamaban la vacante en la Cámara de Diputados. Mientras el Jefe de Policía Silvestre Cau,<sup>7450</sup> a las órdenes del Gobernador Sánchez de Bustamante, quería llenar la vacante con un hijo suyo, clérigo, los Conspícuos Fenelón de la Quintana y José Benito de la Bárcena la querían llenar con Nicolás Ojeda, yerno de Bárcena. Pero el Coronel Uriburu, afiliado al Rochismo,

"...que no se duerme en las pajas ha hecho consentir a Cau que se hará a un lado la candidatura Ojeda y se trabajará solo por la del clérigo. Con tan seductoras promesas se ha separado el Cnel. Cau de D. Plácido y se ha unido a los Barcenistas y según se susurra está pronto a dar un malón el día menos pensado".<sup>7451</sup>

Para 1882, una vez instalado Pablo Blas como Gobernador de Jujuy, se trataba de unificar políticamente a Jujuy con Salta, y para ello Francisco J. Alsina,<sup>7452</sup> le informaba a Victorino de la Plaza que estaban intentando desviar "...al actual Gobernador [Pablo] Blas de las corrientes que lo han colocado al lado del Cnel. [Napoleón] Uriburu, que trabaja como los otros, por Rocha".<sup>7453</sup> La fuerza opositora del Rochismo estaba, en 1883, según le relataba Norberto Quirno Costa a Próspero García, (a) "Flor de Manzanillo",<sup>7454</sup> en

"...el silencio. El sentimiento de propia conservación le hace proceder en la obscuridad...Tiene visión del porvenir pero trabaja en las tinieblas".<sup>7455</sup>

y en 1885 en la publicación *El Norte*, en la imprenta del Comité Irigoyenista. Pero en 1885, Dardo Rocha comprendía que la amenaza de una derrota electoral en la campaña presidencial

"...es su destronamiento y el de sus amigos, para no levantarse jamás y en presencia de esa perspectiva tiene que buscar un acuerdo con uno de los candidatos y ese será el Dr. [Bernardo] Irigoyen a quien cederá la supremacía donde quede su influencia flotante y con un capital material más importante para la presidencia del 92".<sup>7456</sup>

En efecto, mientras el ex-Gobernador y Diputado Nacional Soriano Albarado,<sup>7457</sup> delataba que el Comisario Superior de Policía Silvestre Cau, integrante del Poder

Ejecutivo Provincial, detentado por José María Álvarez Prado, incurría en la incompatibilidad de ser a su vez el Jefe del Piquete de Línea,<sup>7458</sup> el ex-Senador Nacional Segundo Linares,<sup>7459</sup> denunciaba que a los opositores que habían firmado el acta Rochista y no eran empleados

"...se les tomaba de sus casas y se les despachaba en un contingente, destinados por el Gobierno al Ejército Nacional".<sup>7460</sup>

El hecho de haber sido destinados por el Gobernador José María Álvarez Prado al Ejército de Línea, "...sin más delito que haber firmado el Acta de proclamación de la candidatura de Vd.", lo indujeron a Linares a dirigirse a Tucumán para pedir su soltura al Juez Federal Benigno Vallejo.<sup>7461</sup> Y a los pocos meses, el rochista Pío Uriburu,<sup>7462</sup> le informaba a Rocha que en Perico de San Antonio, localidad Jujeña, "...nos derrotaron a balazos con fuerza de línea, matándonos tres hombres e hiriendo a varios".<sup>7463</sup>

Finalmente, con un reiterado sarcasmo *El Nacional* afirmaba que en Jujuy

"...no hubo sino un candidato para Gobernador: Álvarez Prado; en Catamarca uno solo Daza; uno en San Juan: Doncel; uno en Mendoza: Ortega; en Corrientes hubo y hay uno solo: Derqui antes, ahora Vidal. ¿Cuántos candidatos se disputaron el triunfo en Santiago del Estero? Uno solo: Absalón Rojas. ¿Cuántos se disputaron el triunfo en Córdoba? Uno solo: Ambrosio Olmos. Y Olmos y Prado y Rojas y Doncel y Ortega, todos en fin, fueron elegidos por unanimidad. Felices pueblos aquellos que viven bajo tan envidiable uniformidad".<sup>7464</sup>

#### **P-IV Estrategias políticas Rochistas.**

El Rochismo acudía a toda suerte de estrategemas opositoras para alcanzar la hegemonía política. A los efectos de estrechar vínculos con las provincias, el Dr. Rocha

"...trata de ponerse en relación con cualquier persona de las provincias que baja a Buenos Aires, porque valiéndose de medios que él sabe emplear tiene conocimiento inmediato de quien vá a esa y se hace presentar y ofrece facilidades de todo género, a los objetos del viaje de la persona con quien habla".<sup>7465</sup>

A juicio del ex-Senador Provincial de Córdoba David Argüello,<sup>7466</sup> el Dr. Rocha

"...trabaja sin descanso ganando prosélitos con los dineros de Banco con los empleos y negocios en la farisaica Capital, donde va a emplear doscientos millones comprando partidarios; sus trabajos se sienten, en agrupaciones de más o menos importancia, él avanza, tiene sus agentes en las Provincias, con fuertes recursos, procurando minar con dinero la montaña que se ha propuesto pasar no faltarán Febres [por el político entrerriano Ramón Febre] que se rindan ante esta sirena que canta sin descanso".<sup>7467</sup>

Como portavoz del Rochismo, el Dr. Francisco Manuel Costas,<sup>7468</sup> había suplantado a Juan B. Lacroix. Dada la amistad y vínculos de familia que Costas tenía con el Gobernador de Jujuy Álvarez Prado, este último "...no prestará oídos a los Consejos e influencia de [Diputado Nacional Domingo T.] Pérez".<sup>7469</sup> Según el ex-Senador Nacional Segundo

Linares, el Dr. Costas había establecido que el rol opositor de los Rochistas de Jujuy debía reducirse

"...a no hacer nada, por mas que el cielo nos cayera encima, pues él, el Dr. Costas, debía hacerlo todo con el Gobernador [Alvarez] Prado, y otros amigos de la candidatura de Vd. que me nombró, tales como el Dr. Avila, Sergio Alvarado".<sup>7470</sup>

Y un mes más tarde, en Octubre de 1885, los Rochistas e Irigoyenistas se fusionaron "...con el objeto de combatir su candidatura y de consiguiente a la situación local que la sostiene".<sup>7471</sup>

## **P-V Manipulación de los Club de Obreros o Gremios de Artesanos**

Pero en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó electo Juárez Celman, al no poder triunfar electoralmente la unión de Rochistas e Irigoyenistas,<sup>7472</sup> el Ministro de Guerra Carlos Pellegrini y el Gobernador José María Álvarez Prado,<sup>7473</sup> habían descubierto que los Rochistas poseían un plan general de revuelta armada. Álvarez Prado, que contaba con el apoyo de un llamado Club de Obreros, es decir una asociación de artesanos,<sup>7474</sup> integrantes de la denominada plebe, comprobó que los Rechistas, que le disputaban la clientela artesana, "...han resuelto interrumpir la elección produciendo un motín traído de Salta y que estallará en los Departamentos de la Puna".<sup>7475</sup> Ellos, los Rechistas, manipulaban poblaciones inescrupulosamente, como masa de maniobras electoral, apadrinando

"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia".<sup>7476</sup>

El entonces Diputado Nacional Domingo T. Pérez,<sup>7477</sup> mentor intelectual de Álvarez Prado, hacía creer al Gobierno Nacional "...que la situación actual de Jujuy está en peligro i que se conspira revolucionariamente para derrocar esas autoridades".<sup>7478</sup>

Para evitar ello, el Gobierno Nacional planeó una estrategia disuasoria ordenando al Gobernador Juan Solá que remita a Jujuy cien remingtons. Justo Aguilar le explicaba a Francisco Costas que el envío de los Remingtons era "...para ejercer mayor presión sobre Álvarez Prado, y satisfacer así las aspiraciones de Domingo Pérez en su política Juarista".<sup>7479</sup> Pero Pérez no estaba tan errado en sus pronósticos. El rochista Pío Urriburu había pensado en un principio en traer las armas de Bolivia.<sup>7480</sup> Existían en poder del Cónsul Boliviano en Salta Don Benjamín A. Dávalos "...tres mil remington, cincuenta mil tiros, diez piezas de cañones para montaña y mil sables".<sup>7481</sup> Para negociar secretamente esta compra era necesario enviar a Don Sergio Corbalán,<sup>7482</sup> a conversar con el Presidente Boliviano Gregorio Pacheco.<sup>7483</sup> Aparentemente, traer las armas de Bolivia era más costoso e inseguro, por tener que pisar territorio Jujeño. Por ello, Pío Urriburu desistió de esta operación y ordenó traer las armas de Chile, que eran deshechos de la Guerra del Pacífico.<sup>7484</sup> Comprando las armas en Chile "...nos cuestan menos y las podemos traer directamente sin tocar la Provincia de Jujuy".<sup>7485</sup> Y en Febrero de 1886, Alvarez Prado justificaba que para vencer en las elecciones se echara mano del Juzgado Federal. Al parecer esta acusación era cierta, por cuanto en abril de 1886, Pío Urriburu le escribe al Gral. Luis M. Campos confesándole con gran sagacidad y realismo que en Jujuy

"...tenemos que vencer con dinero, pues en todos los Departamentos el Gobierno ha mandado fuerzas y los Escrutadores insaculados son enemigos. Hemos vístonos [sic] en el caso de tener que comprar a los Comisarios, escrutadores, etc.; pues careciendo de armas no tenemos otra arma que el dinero, de la que hay que valerse para contrarrestar la fuerza".<sup>7486</sup>

A consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y ausente de armas y municiones, Álvarez Prado le confesaba a Roca: "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial", es decir comprando jueces.<sup>7487</sup> Más aún, para las elecciones presidenciales de 1886, Álvarez Prado se empeñó con éxito en la práctica del nepotismo, haciendo Diputado a su cuñado Manuel Padilla Bárcena.<sup>7488</sup>

En cuanto a maniobras de distracción, los Rochistas implementaron una estrategia de movilización. Carlos Pellegrini le informaba a Juárez Celman que el rochista Pío Uriburu estuvo con el Gobernador de Tucumán Santiago Gallo "...para pedirle que facilitara armas y dinero a [Lisandro] Olmos,<sup>7489</sup> para invadir Catamarca, lo que le fue negado en declaraciones terminantes".<sup>7490</sup> Pero Pellegrini no creía

"...que puedan tener esperanzas de dominar una provincia con una montonera que sería corrida por un Escuadrón de Caballería, sino probablemente distraer la atención, para tentar algo aquí, porque en caso de una revuelta general, La Plata sería el eje y debe defenderla".<sup>7491</sup>

También la policía se había convertido en un instrumento de poder. Desde Jujuy, Teodosio Temístocles Carrizo,<sup>7492</sup> le informaba a Victorino de la Plaza que el Gobernador Eugenio Tello,<sup>7493</sup> herramienta al servicio del Cnel. Napoleón Uriburu, gobierna al Jefe de Policía Coronel Silvestre Cau,

"...y por medio de este maneja hasta el mismo [Domingo T.] Pérez por el temor que le inspira el Jefe de Policía que es el todo en provincias como esta, cuando se tiene la desgracia de estar gobernados por hombres pusilánimes y sin voluntad propia".<sup>7494</sup>

A juicio del Gobernador Tello, la prensa se transformó también en "...una poderosa palanca que ha contribuido con eficacia a crear la actual situación".<sup>7495</sup> Y dos años más tarde, no obstante que el Gobernador Álvarez Prado, devenido un Juarista, le había prometido al ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el periódico oficial La Unión guardaría silencio en la cuestión electoral,

"...patrocinaba abiertamente la candidatura Juárez, combatiendo la de Vd. [Rocha], [y] se destituía de la manera más injustificable a los empleados que habían firmado el acta Rochista...".<sup>7496</sup>

En Salta --también perteneciente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía la disputaban también los Autonomismos Roquista, Juarista, Irigoyenista y Rochista-- a la gobernación de Moisés Oliva,<sup>7497</sup> le siguió en 1881 la de Miguel S. Ortiz,<sup>7498</sup> primo hermano del Senador Nacional Francisco J. Ortiz. La elección de Gobernador --en opinión escrita de Clodomiro Moreno, dirigida a Victorino de la Plaza-- iba a ser muy significativa por cuanto "...en el Gobierno entrante se a de hacer la elección de los Diputados que deben ser más tarde los Electores de Presidente".<sup>7499</sup> Confirmando

esa impresión, Francisco J. Alsina le advertía a Plaza que "...necesitamos hacer del que suceda a [Miguel S.] Ortiz en el Gobierno de esta Provincia, un Gobernador elector y en ese sentido trabajamos".<sup>7500</sup> Y Clodomiro Moreno le aconsejaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza,

"...que para tus fines particulares debe aquí nombrarse Gobernador al que sea de tu opinión porque en el Gobierno entrante se a de hacer la elección de los Diputados que deben ser más tarde los Electores de Presidente".<sup>7501</sup>

Pero el poder de la familia Ortiz no alcanzó a perdurar, pues en mayo de 1882, Clodomiro Moreno se sinceraba con el Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza, y le transmitía que "...el partido Ortiz está muy caído con la retirada de los dos Ortices, que heran [sic] nervio de la situación".<sup>7502</sup> La decadencia de la facción Orticista, automáticamente le daba mayor espacio político a la facción Uriburista. Pero según Moreno, la candidatura a Gobernador con más posibilidades de éxito era la de José Antonio Chavarría,<sup>7503</sup> pues no sólo era recomendado por el General Roca, sino que contaba con extensas relaciones de parentesco, entre ellas con su primo hermano político el ex-Gobernador Interino Miguel Francisco Aráoz Usandivaras,<sup>7504</sup> y con Don Juan Solá Chavarría [su primo hermano carnal] "...quien creo no le hará oposición".<sup>7505</sup> Llevaban la candidatura de Chavarría asegurada --por sus trabajos previos como ministros de Miguel S. Ortiz-- el hermano de Juan Solá y aliado a Aniceto Latorre, Don Manuel Solá Chavarría, y el Dr. Abrahám Echazú Figueroa.<sup>7506</sup> En tan difícil circunstancia, en que las opiniones ya estaban comprometidas, Victorino de la Plaza, como vocero de Roca, creía que el candidato debía ser el Dr. Rafael Ruiz de los Llanos.<sup>7507</sup> Pero Mariano Zorreguieta,<sup>7508</sup> en carta a Plaza, no estimaba prudente,

"...iniciar recién a última hora la [candidatura] del recomendable Dr. Ruiz de los Llanos, que requeriría tiempo para poderla hacer prestigiosa entre los amigos, casi en su totalidad ya comprometidos con unos y con otros".<sup>7509</sup>

Obviamente, el cálculo de Moreno fue errado, pues Solá no le quitó el bulto a la candidatura y le hizo oposición a Chavarría.<sup>7510</sup> De resultas de ello, Juan Solá fué designado nuevamente Gobernador de la provincia, desde cuyo cargo y tras largas vacilaciones apoyó la candidatura presidencial de Juárez Celman.<sup>7511</sup> Y dos años más tarde, el Ministro Eduardo Wilde le confesaba al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, que el Gobernador de Salta Juan Solá "...ha debido ser forzosamente nuestro y sin embargo es el único que se alza con el santo y la limosna".<sup>7512</sup> En efecto, Solá coqueteaba con el Rochismo. Como consecuencia de dicho diagnóstico, el Ministro Wilde concluía que a Solá "...debíamos haberlo comprado o tumbado (creo que esto último era lo mejor)".<sup>7513</sup> Las hostilidades no se hicieron esperar. En 1885 el Senador Nacional Francisco J. Ortiz,<sup>7514</sup> planteó la incompatibilidad entre las funciones gubernativas de Juan Solá y las militares, que detentaba como Jefe de la Frontera del Chaco.<sup>7515</sup> El no cumplimiento de estas normas sobre incompatibilidades, argumentaba Ángel Quirós, habían dado lugar a que con el tiempo el Regimiento se politizara y cayera en la mayor de las indisciplinas.<sup>7516</sup> Finalmente, el Gobierno destituyó al Cnel. Solá de la Jefatura de la Frontera de Salta nombrando en su lugar al Comandante Baldomero Lamela.<sup>7517</sup> Por último, si bien el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los militares, ser elegidos Diputados; las leyes orgánicas de la Marina y del Ejército limitaron a comienzos de siglo esa facultad constitucional.<sup>7518</sup>

## **P-VI Neutralidad política de los gobernadores.**

La neutralidad política de los gobernadores en períodos electorales solía ser garantía de paz. Sin embargo, en la lucha por la candidatura presidencial de 1886, en que el Gobernador Solá pretendía mantener su neutralidad, al Rochista Juan B. Lacroix le fue fácil conseguir de manos de su correligionario el Jefe de la Oficina del Telégrafos de Salta, Don Napoleón Martiarena, la copia de un telegrama del Canciller Francisco J. Ortiz dirigida al Ministro de Gobierno Juan M. Tedín, en la que se desmentía dicha conducta (neutralidad).<sup>7519</sup>

Y un año más tarde, Pío Uriburu le comunicaba a Dardo Rocha, que él tenía las oficinas del telégrafo a su servicio "...y sé, con seguridad, lo que se transmite, de manera que difícilmente pueden engañarme".<sup>7520</sup> Como representantes al Congreso Nacional fueron enviados Manuel Solá, hermano del Gobernador, y Abrahám Echazú, el sobrino carnal del Diputado Provincial Marcos Figueroa,<sup>7521</sup> los que según este último habrán de responder "...decididamente a la política Nacional y Provincial que sostenemos".<sup>7522</sup> Y para asegurar mejor la fusión entre Rochistas e Irigoyenistas y aventar las seducciones que el Juarismo practicaba sobre los Irigoyenistas, era preciso ofrecer poderosos incentivos selectivos. Ángel Ovejero cuenta que los Rochistas, en un comienzo llegaron hasta ofrecer a los Irigoyenistas dos diputaciones.<sup>7523</sup> Esto último tuvo "...en gran alarma a los de Juárez que nos han buscado haciéndonos proposiciones de arreglo en nombre de aquel".<sup>7524</sup> Pero en Octubre de 1885, debido al viaje del rochista Luis del Carril,

"...se les ve ahora, a ambas fracciones [Juaristas e Irigoyenistas] dispuestas a ponerse de acuerdo y se asegura ya, que si concluyen por avenirse entre ellos, será sobre la base de proclamar todos la candidatura Juárez".<sup>7525</sup>

Pero pese a su unión, en 1886, el Rochista Inspector de Telégrafos Luis del Carril, debió denunciar la zurrapa, que consistió en dejar sin insacular (elegir los escrutadores de las Mesas Electorales) los Departamentos dominados por la oposición, so pretexto de no haberse publicitado a tiempo los Registros.<sup>7526</sup> Carril le informaba a Rocha que

"...nosotros hemos hecho buscar los Registros de los Departamentos no insaculados para reclamar de la Junta la insaculación que les corresponde y en caso que ella niegue la insaculación, nos presentaremos acusándola, sin perjuicio de hacer la elección con los insaculados para formar las mesas de Febrero".<sup>7527</sup>

## **P-VII Fragmentación de la elite política. El caso de Catamarca.**

En Catamarca, provincia perteneciente al subconjunto político del Norte, la sociedad se encontraba inmersa en intensos vínculos reforzantes,<sup>7528</sup> y fracturada por la incidencia de un factor pre-moderno: la religión; donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la afiliación católica enfrentadas a otras movilizadas por la característica compartida del laicismo. Esta realidad se daba en un contexto nacional complejo donde la conflictividad interna se hallaba también correlacionada con una conflictividad política externa, disputada entre el Autonomismo Cordobés (Juarismo) y el Liberalismo Mitrista.

A semejanza de Salta y La Rioja, la Justicia y la Banca de Catamarca estaban del lado de la oligarquía dominante. A comienzos de la década del 80, en Catamarca se

manifestaba una estrecha unión entre el Gral. Octaviano Navarro,<sup>7529</sup> y la Casa comercial de los Molina.<sup>7530</sup> A los Sres. Molinas, dueños de la Casa Comercial más importante de Catamarca, les interesaba "...tener los Jueces de su parte y como desde años los tienen, han irritado sobremanera el espíritu público y lo tienen decididamente en contra".<sup>7531</sup> La Casa Molina, que cumplía el mismo rol que la Casa Bazán y Luna en La Rioja, había logrado imponer como Gobernador en 1880 a Joaquín Acuña, hermano del yerno del Gral. Navarro.<sup>7532</sup> El último paso de los Molina y los Navarro (1882-1885) por el poder, era a juicio del Diputado Nacional Juan J. Ibáñez,

"...el capítulo del martirologio del pueblo catamarqueño. Los atrios, los comicios electorales fueron verdaderas hecatombes; todo se falseó, constitución, leyes, todo fué despreciado y ultrajado".<sup>7533</sup>

La administración de la filial del Banco Nacional estaba íntimamente coludida o coaligada con la representación legislativa. A fines de 1882, el candidato a Gobernador de la Provincia Manuel F. Rodríguez,<sup>7534</sup> le reportaba a Roca que el Gerente y el Cajero de la Sucursal del Banco Nacional, que eran a su vez Diputados a la Legislatura, "...son los que con más empeño han trabajado en contra de mi candidatura".<sup>7535</sup> Para ello utilizaban la propia sede del Banco, "...comprometiendo seriamente de esta manera el crédito de una institución".<sup>7536</sup> En opinión del Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto, la Casa Comercial de los Molina, vinculada al ex-Gobernador de Catamarca Gral. Octaviano Navarro, se encontraba a comienzos de 1883

"...en condiciones desfavorables y ha podido ralear [sic] la banca rota mediante un fuerte préstamo que ha obtenido del Banco Provincial de Buenos Aires".<sup>7537</sup>

En 1883, se creía casi con seguridad en "...un rompimiento entre los Navarros y Molinas", por estar esta última familia próxima al Rochismo.<sup>7538</sup> Pero para septiembre del mismo año, pareciera ser --por el testimonio brindado por el Gobernador Joaquín Acuña Molina,<sup>7539</sup> yerno del Gral. Navarro-- que ambas Casas sellaron un armisticio.<sup>7540</sup>

Esta crisis o inestabilidad política en Catamarca devino necesariamente en una fragmentación de su elite. Luego de la formación en la Legislatura de una facción adicta al Diputado Nacional Dr. Fidel Castro Escudero,<sup>7541</sup> de pasado Mitrista, "...tenemos hoy tres partidos en escena": el Clerical [Figuerista], dirigido por el Dr. Marcos Figueroa;<sup>7542</sup> el Castrista, o antiguo Mitrista, dirigido por el Dr. Fidel Castro; y el situacionista [Navarrista].<sup>7543</sup> Esta fragmentación política de la elite dió lugar a numerosos cabildeos y asambleas.<sup>7544</sup> Para ese entonces, Francisco Caracciolo Figueroa --que contaba con prestigio entre los gremios artesanales y las mujeres por haber defendido a aquellos artesanos que carecían de taller y a las amansaderas-- le reprochaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que insistiera en colocar de Gerente de la Sucursal del Banco Nacional "...a un cuñado de [Fidel] Castro...removiendo al Sr. Don José María Pare sin otro pretexto, sin duda, que ser este Sr. pariente mío".<sup>7545</sup> Desaparecido el Gral. Navarro y perseguido el clero, los Navarristas fueron derribados por la unión de los demás partidos, pero "...el partido Figuerista [clerical] quedó deshecho, y a expensas de él se levantaron Castristas y Rodriguiztas".<sup>7546</sup>

Más luego, la intensa fronda reinante en Catamarca dió lugar a la presencia de un tercer actor en discordia, que vino a jugar el papel de árbitro: la intervención federal. Para fines de 1884, la Cámara de Diputados sancionó la intervención del Dr. Onésimo Leguizamón.<sup>7547</sup> Los Molina y los Navarro cayeron del poder "...ante la fuerza formidable

de la opinión, que se levantó para arrojarlos de él", con la ayuda de la intervención federal.<sup>7548</sup> Leguizamón convocó en 1884 a elecciones para Diputados, prescindiendo para ello de la Legislatura. En esa ocasión, Bernardo de Irigoyen visitó Catamarca, encabezando a gente, cuyos recuerdos "...de su funesta influencia en la política de esta Provincia, así como lo son los de la mazhorca de funesta memoria en este pueblo, donde no se encuentran tres familias que no lleven aún el degüello y la matanza de Maza y Oribe".<sup>7549</sup> La visita fue un chasco, pues aparte de su escasa repercusión fue reprimida por el Comandante Maldones.<sup>7550</sup> El día de la elección, según contaba el Senador Nacional Manuel F. Rodríguez,

"...se hizo votar el número de sufragantes convenido [con la oposición] y haciéndolo solamente las personas decentes".<sup>7551</sup>

Sin embargo, como se había reunido gente del pueblo, es decir de la llamada plebe, Línor B. Sotomayor me aseguró

"...que esa gente no votaría y que con ese objeto tenía un ajente entre ella, permaneciendo todo tranquilo, me retiré a casa",<sup>7552</sup>

Pero a las 12 del mediodía, "...Sotomayor me hizo decir que lo ayudase a contener la jente",<sup>7553</sup> que con Guillermo Castaños a la cabeza

"...pretendía votar por otra lista. No pudiendo ir personalmente, mandé a un hijo mío y fueron avisados los situacionistas que nada hicieron por impedirlo, pues que hasta los miembros de las mesas que pertenecían a ellos habían estado en el complot, y el hecho se consumó contra nuestra voluntad y deseos".<sup>7554</sup>

Finalmente, las elecciones las perdió el oficialismo. Según el Interventor Leguizamón, la elección

"...ha sido tumultuosa durante la primera hora, pero habiéndose apercibido de la causa, que eran los fraudes de dobles o triples votaciones y desórdenes consiguientes, y creyendo que elecciones presididas en tu nombre [Roca] no debían ser solo libres, sino honradas, ordené que los ciudadanos después de haber sufragado fuesen vigilados en grupos separados correspondientes a las dos mesas y a los dos partidos".<sup>7555</sup>

Al principio, los representantes del gobierno aceptaron la medida, como justa, imparcial y tranquilizadora; pero, después de una hora, viéndose sin votos,

"...reclamó de la vigilancia de sus amigos pensando echar mano de ellos para preparar sin duda nuevas emisiones de votantes. Yo [Leguizamón] mantuve la disposición, sin perjuicio de proceder a dejar en libertad completa a la parte decente, ocupada o enferma, y esto ha originado la protesta frívola de [Jamín] Ocampo y pocos amigos por actos que no afectan a la libertad del sufragio ni a la condición política de los ciudadanos".<sup>7556</sup>

Las mesas, totalmente favorables a la situación, porque eran las antiguas,

"...comenzaron entonces a rechazar los votos de la oposición a pretexto de cambio de nombre, falta de edad, etc., y como estaban en mayoría, su decisión hacía ley".<sup>7557</sup>

Apercibido de estas arbitrariedades, por denuncia de los comisarios, Leguizamón se trasladó personalmente al atrio, y

"...por medio de reflexiones, advertencias y llamamientos amistosos a la equidad y honradez política conseguimos que el acto continuase sin interrupción hasta su término, no habiendo motivo para lamentar incidente alguno, sino la gritería grosera de Rodríguez y Castro que hubieron de perjudicar sus fueros en un momento en que se insolentaron injustamente con el Comisario Galiano".<sup>7558</sup>

Dos años más tarde, para Febrero de 1886, Lisandro Olmos, el Dr. J. M. Espeche,<sup>7559</sup> y otros hombres de prestigio de Catamarca se encontraban en Tucumán. Se hallaban "...en la mayor intimidad con los prohombres de los Partidos Unidos".<sup>7560</sup> Aún mas, el Juarista catamarqueño Baltasar Lema,<sup>7561</sup> sospechaba que "...estén fraguando alguna combinación hostil a nuestro popular candidato [Daza]".<sup>7562</sup> El propio Daza en carta a Roca, le denunciaba que "...puedo probar las complicidades de las autoridades de aquella provincia [Tucumán], con los sediciosos y ambiciosos adversarios".<sup>7563</sup> El Ministro Delfín Gigena,<sup>7564</sup> "...ha tocado todos los resortes que a su alcance han estado para dominar a esta Provincia [Catamarca], pero todas sus pretenciones fatuas han quedado completamente desbaratadas".<sup>7565</sup> Y para Julio de 1886, el Gobernador Daza, pese al público boicot del Clero contra la candidatura presidencial de Juárez Celman, se ufanaba de haber cooptado a los Castristas y haber "...conseguido desmembrar a las fracciones de esta Provincia".<sup>7566</sup> Y siendo para Guillermo Leguizamón,<sup>7567</sup> "...el Dr. Castro gobernado como nadie lo ignora, por [Líndor] Sotomayor y [Federico] Espeche, la influencia predominante en la opinión es la del Dr. Rocha".<sup>7568</sup>

## **P-VIII La división del Autonomismo. El caso de La Rioja.**

En La Rioja, provincia correspondiente al subsistema político del Centro, pero con estrechos contactos con el subconjunto Norteño, su hegemonía se hallaba también profundamente dividida entre los Autonomismos Juarista y Rochista. En 1880, como resultado de la actitud del Gobernador Vicente Almandos Almonacid,<sup>7569</sup> y por intervención del Cnel. Nicolás Barros,<sup>7570</sup> se "...ha logrado dividir el partido autonomista en tres grupos".<sup>7571</sup> Intervenida La Rioja por el Comisionado Pedro Nolasco Arias, impuso como Senadores Nacionales, sin consultar con partido alguno, a Adolfo Dávila y al Coronel Nicolás Barros.<sup>7572</sup> Desplazado Barros por Francisco Alvarez, este último impuso de gobernador a su futuro yerno, Francisco V. Bustos.<sup>7573</sup> Y para suceder a Bustos, la elección de Gobernador estaba según Juárez Celman, "...entre [Félix] Luna y [Baltasar] Jaramillo, ambos Mitristas convertidos".<sup>7574</sup> Respecto de Jaramillo, Juárez Celman tenía sólo "...las seguridades que ofrece Bustos, pues no lo conozco y los informes que he recibido son malos".<sup>7575</sup> Y respecto de Luna, Roca no quería ni oírlo nombrar. En efecto, las razones que tenía Roca para creer que Luna no era conveniente se remontaban a la época cuando la candidatura de Sarmiento, en que Luna, íntimo amigo del General José Miguel Arredondo y de todos los oficiales del 6 de Línea, a quienes les debía la vida desde tiempos de la Montonera de Felipe Varela,

"...es el primero que no sólo nos da la espalda, sino que se convierte en el enemigo más implacable y en el más ardiente Elizaldista y Taboadista [Mitrista] a quien empezó por mandarle una pluma de oro".<sup>7576</sup>

Finalmente, fallecido Jaramillo y queriendo Bustos retener el poder dentro de su familia, auspicio como sus sucesores a dos cuñados suyos, Samuel García y Emilio Álvarez; pero su padrinazgo fracasó, según lo relatan Pizarro (1883) y Bazán (1979).<sup>7577</sup> El Gobernador Francisco V. Bustos "...hará que sus amigos los Electores den su voto para Gobernador por el Sr. [Jamín] Ocampo".<sup>7578</sup> Con la guerra civil, las prácticas políticas se habían relajado.<sup>7579</sup> En 1884, el Coronel Nicolás Barros, coaligado al ex-Gobernador Francisco Vicente Bustos, organizó "...un club bajo la base exclusiva del Colegio Nacional y sostenido por el Subsecretario del Ministro de Justicia Don Florentín Barros, hijo de Barros".<sup>7580</sup> Este club, a juicio de Mardoqueo Molina,<sup>7581</sup>

"...hace propaganda de una adhesión ciega a la política del Presidente y combate duramente al Gobierno [de Jamín Ocampo], que lo apoya el pueblo en masa, llamándolo Rochista".<sup>7582</sup>

El 9 de Julio se había conspirado al extremo de abortarse una revolución cuyos autores se sospechaba fueron el Coronel Nicolás Barros y el ex-Gobernador Francisco Vicente Bustos y se ha afirmado "...que se ha pretendido comprar parte de la fuerza nacional que sirve de guarnición de cárcel [mandada por el Coronel Ruperto Fuentes]".<sup>7583</sup> Sin embargo, a la terminación del gobierno, Francisco V. Bustos y Jamín Ocampo,<sup>7584</sup> "...trabajarán para que una de las Senaturías que vacaren se le dé a un amigo de Ocampo, siempre que así sea del agrado del Sr. Presidente Roca".<sup>7585</sup> En cuanto al régimen electoral, el ex-Diputado Nacional Guillermo San Román,<sup>7586</sup> le ratificaba a Dardo Rocha desde La Rioja, que la Junta insaculadora para la formación de las mesas de calificación y las mesas electorales "...nos asegura sino mesas nuestras por completo, en su mayoría favorables y en otras imparciales".<sup>7587</sup>

Asimismo, los intereses políticos penetraron en el mundo de la banca Riojana. En 1885, el dirigente Bustista,<sup>7588</sup> y futuro Ministro de Gobierno Olímpides E. Pereyra le transmitía a Juárez Celman el miedo que se quisiera convertir el Banco "...donde imperaba la familia Luna y Bazán...en elemento de lucha para meter en danza al [Dr. Abel Bazán] cuñado de [Benjamín] Sastre".<sup>7589</sup> Con motivo de las elecciones celebradas el 29 de Marzo de 1885, Guillermo San Román,<sup>7590</sup> fundador del periódico La Defensa, le informa a Rocha que lo que ha sucedido "...es el acto más brutal de fuerza producido hasta hoy y de propósitos más perversos".<sup>7591</sup>

Debemos entonces concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato Juarista fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía especializada, pero no fue lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que impidieran la continuidad del régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.

## **Epílogo Sección III-D**

En esta sección, donde analizamos las disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación de un orden notabiliar o elitista, encontramos que la crisis política de Santiago del Estero, a semejanza de lo ocurrido en Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador Iriondo, y en Entre Ríos con el Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder discrecional y arbitrador del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. El Presidente proponía candidatos a Gobernador y también incidía en la composición de las listas de Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era interpelado por las distintas facciones políticas, intereses económicos, colectividades extranjeras y factores de poder. La breve historia de Santiago del Estero aquí relatada también indica como un Presidente de la República ve mermado su poder arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento de su mandato, al extremo de tener que negociar con su eventual sucesor las candidaturas de los gobernadores en juego.

Debemos también concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato Juarista (Juárez Celman) fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía especializada, pero no fue lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que impidieran la continuidad del régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.

### **Sección III-E      Crímenes políticos en la degradación del orden republicano**

En general, la historiografía discrimina los crímenes políticos según que se traten de fundacionales, liberadores o sacrificiales, y según que hubieren ocurrido fríamente o en combate, o por venganza, represalia y escarmiento. También existieron aquellos crímenes que fueron cometidos con las formalidades de rigor (consejo de guerra o juicio sumario) o secretamente por medio del terror (bandas organizadas al efecto como la Mazorca o Sociedad Popular Restauradora).

Habiendo en la sección anterior tratado las disputas, rupturas y quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista, en la sexta sección nos dedicaremos a investigar los crímenes políticos en la degradación del orden republicano, que desarrollamos en cuatro capítulos consecutivos: los magnicidios políticos emanados de la guerra civil (1812-40), el crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial (1884), los escarmientos anti-sediciosos y los ajusticiamientos políticos (1891), y la descomposición del oficialismo y el atentado político (1902)

#### **Capítulo III-E-17      Magnicidios políticos emanados de la guerra civil (1809-1840)**

A partir del mismo proceso revolucionario, y más precisamente, a partir de 1809, año de la proto-revolución de Chuquisaca y La Paz; y prosiguiendo en 1810 con el luctuoso episodio de Cabeza de Tigre o Monte de los Papagayos (Córdoba), se dio inicio en los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata una espiral de terror.<sup>7592</sup> En 1820, año de los tres gobernadores, y a partir de 1827, año de la batalla de Ituzaingo se habrían experimentado como consecuencia del alzamiento y desmovilización de los

ejércitos patrios, un incremento en las rivalidades y fragmentaciones territoriales así como en las conflictividades internas o guerras civiles, y de resultas de las mismas un creciente proceso de legitimación carismática con su posterior rutinización o devenir burocrático.<sup>7593</sup>

Estos funestos fenómenos habrían erosionando a los clanes familiares de cada una de las provincias de los cuatro subsistemas políticos (Norte, Centro, Cuyo y Litoral), lo cual constituyó lo que podríamos denominar la crisis de un patriciado, cuyos orígenes más próximos se remontaban a las desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos, entre los denominados sarracenos, partidarios de los Jesuitas, y los denominados ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a su política secularizadora y desjesuitizadora (Expulsión de los Jesuitas).<sup>7594</sup> Los enfrentamientos entre clanes familiares en las provincias interiores --que en el siglo XVIII habían originado las célebres concordias-- se prolongaron entonces a lo largo del siglo XIX, a pesar del triunfo de las armas patriotas en las guerras de independencia y del liberalismo en la llamada Organización Nacional.

Cuando a comienzos del siglo XIX se desataron las guerras de independencia, seguidas por las guerras civiles y por numerosos crímenes o magnicidios políticos,<sup>7595</sup> los patriciados provinciales sufrieron necesariamente el impacto de las mismas. En 1809 fue ajusticiado en Chuquisaca el proto-mártir Pedro Domingo Murillo; en 1810 el ex virrey Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre; y en 1812 el alcalde Martín de Alzaga.<sup>7596</sup> Seis años más tarde, luego de la jura de la Independencia y la convocatoria del Congreso de Tucumán (1816), y luego de la afirmación de un unitarismo radicalizado, se inicia en las Provincias Unidas una espiral o encadenamiento de ajusticiamientos y represalias, cada cual más feroz. En 1818, luego del desastre de Cancha Rayada, fueron ajusticiados los hermanos chilenos Luis y Juan José Carrera por orden de Toribio de Luzuriaga pero a instancias de Bernardo de Montegudo, quien estaba recientemente confinado en Mendoza.<sup>7597</sup> Luego, en el mismo mes y año fue muerto el popular guerrillero chileno Manuel Rodríguez en un incidente cordillerano cuando era llevado detenido a Mendoza.<sup>7598</sup> Un año después, en febrero de 1819, de resultas de una sublevación de los presidiarios españoles confinados en San Luis, en la consiguiente represión mueren medio centenar de ellos, siete de los cuales fueron fusilados con dictamen de Montegudo por sospecharlos estar en connivencia con la montonera de Carrera.<sup>7599</sup> Con posterioridad, ese mismo año, fueron ajusticiados en Buenos Aires un par de franceses acusados también de conspirar con Carrera.<sup>7600</sup>

En ese entonces, los planes monárquicos de Pueyrredon y su sucesor Rondeau, la amenaza de una inminente expedición española para recuperar Buenos Aires y las pugnas masónicas pro-británicas y pro-francesas no hacían mas que alimentar las perspectivas políticas de Carrera y de Alvear.<sup>7601</sup> Y dos años más tarde, en 1821, el mayor de los hermanos José Miguel Carrera --sindicado como el principal responsable de la derrota de Rancagua (1814)-- al intentar retornar a Chile con su "Ejército Restaurador", para vengar la muerte de Rodríguez y de sus dos hermanos menores así como para derrocar a su eterno enemigo Bernardo O'Higgins, fue traicionado por sus propios camaradas de armas (Inchausti, Fuentes y Moya), condenado por un consejo de guerra formado al efecto por el Gobernador Tomás Godoy Cruz, y fusilado en Mendoza en septiembre de 1821.<sup>7602</sup>

La prédica del mayor de los Carrera --quien estaba dotado de un fuerte carisma personal así como de una elocuencia cautivante-- reproducía las ideas federalistas de

Artigas, pues acusaba a O'Higgins de haberse sometido a la hegemonía de Buenos Aires.<sup>7603</sup> Tres meses antes del ajusticiamiento de Carrera, en junio de 1821, fue asesinado en la Cañada de la Horqueta (Salta) el jefe de la guerrilla gaucha Martín Miguel de Güemes.<sup>7604</sup> Y en julio de 1821, al pretender el Supremo Entrerriano Pancho Ramírez dominar a las fuerzas del Gobernador Juan Bautista Bustos fue muerto en combate en Córdoba conjuntamente con Delfina, su amante portuguesa.<sup>7605</sup> Otros siete años más tarde, Juan Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo ordenando fusilar a Manuel Dorrego.<sup>7606</sup> Y doce años después, en 1840, el mismo "destino sudamericano" le tocó en suerte al propio Lavalle.<sup>7607</sup> En enero de 1825 fue asesinado por dos morenos en Lima el que fuera Ministro de San Martín en el Perú Bernardo de Monteagudo, suscitando su muerte todo tipo de contradictorias cavilaciones, pues se lo sindicaba como el instigador de la muerte de los hermanos Carrera en 1818.<sup>7608</sup>

Pero luego de la firma del Pacto Federal de 1831 y más específicamente luego de la división del federalismo radicalizado, se reinicia en las Provincias Unidas una larga espiral de muertes, venganzas y represalias, cada cual más sanguinaria.<sup>7609</sup> En 1834, el Gobernador de Salta Pablo Latorre, un antiguo oficial de Güemes, asediado por la enemistad de Alejandro Heredia y por los afanes autonomistas de los jujeños, terminó siendo asesinado en prisión argumentándose como causal un intento de fuga.<sup>7610</sup> Para asegurar la sucesión de Latorre fue comisionado por Rosas a Salta el caudillo riojano Facundo Quiroga, produciéndose a su retorno en 1835 el atentado que le costó la vida.<sup>7611</sup> Sus inspiradores, los hermanos José Vicente y Guillermo Reynafé, de Córdoba, fueron ajusticiados en 1837 en Buenos Aires.<sup>7612</sup> Ese mismo año, en la batalla de Pago Largo, halló la muerte el Gobernador de Corrientes Genaro Berón de Astrada. Desde Catamarca donde se encontraba refugiado, el ex gobernador de Córdoba [Pedro Nolasco Rodríguez](#) pretendió derrocar a Manuel López (Quebracho), pero resultó derrotado y muerto en la intentona (1839). En Santiago del Estero, donde se hallaba desterrado, fue remitido a Rosas y fusilado el Gobernador de Santa Fé Domingo Cullen (1839).<sup>7613</sup> El gobernador de Tucumán Alejandro Heredia fue ultimado en medio del descrédito ocasionado por el frustrado enfrentamiento con la Confederación Peruano-Boliviana (1839). A su vez el Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza (1840),<sup>7614</sup> fue asesinado en su propio despacho de la Legislatura, y su hijo Ramón halló luego la muerte en combate.<sup>7615</sup> Y en el contexto de la caída y derrota de la Coalición del Norte fueron decapitados su jefe civil el Mártir de Metán Marco Avellaneda (1841),<sup>7616</sup> y sus aliados los gobernadores de La Rioja Tomás Brizuela (1841) y de Catamarca José Cubas (1841).<sup>7617</sup> Todos estos magnicidios encontraban su precedente en la violencia anárquica y fratricida desatada el año 1820 y su promotor en la persona de quien detentaba la suma del poder público.

Con motivo de estos magnicidios y a propósito de sus orígenes y autorías, se desencadenaron repetidas polémicas entre la prensa de Santiago de Chile y Montevideo por un lado, y la prensa Rosista por el otro. En el ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, paraje de Cabeza de Tigre (Córdoba), la incorporación del Teniente Tomás Bailón Allende al Ejército Patriota vino acompañada con una aclaración por demás ilustrativa del nuevo discurso político que se inauguraba con la Revolución.<sup>7618</sup> Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera Junta le remitió los despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que sancionaba sólo la responsabilidad individual y eliminaba la aplicación de la arcaica responsabilidad colectiva o culpa de la inocencia. Comenzaban los considerandos del despacho advirtiendo que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han

producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".<sup>7619</sup> Pero fue en las provincias de Tucumán, Mendoza y La Rioja donde la crisis del patriciado tomó el estado más virulento, crisis que tuvo su origen en las postrimerías del siglo anterior.<sup>7620</sup> En Tucumán, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se sucedieron entre los miembros de la elite política íntimas relaciones de parentesco, que culminaron a comienzos del siglo XIX en un exterminio mutuo sin precedentes, sólo comparable a las guerras de las Dos Rosas en Inglaterra (ajusticiamientos de Eduardo II y Ricardo II) o en el mejor de los casos a los conflictos de las ciudades italianas de la Baja Edad Media.<sup>7621</sup> La enconada enemistad que existió entre el Gobernador Diego Aráoz Valderrama,<sup>7622</sup> y su sobrino tercero el Presidente de la República del Tucumán Bernabé Aráoz y Córdoba,<sup>7623</sup> era probablemente heredada de los conflictos suscitados a fines del siglo XVIII.<sup>7624</sup> Fue esta enemistad la que contribuyó finalmente a que el General Javier López, yerno de Don Diego Aráoz Valderrama, ajusticiara al primer caudillo federal del Noroeste Argentino, el General Bernabé Aráoz.<sup>7625</sup> Asimismo en Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, y por cuya supremacía política competían Córdoba y Buenos Aires, se sucedían acontecimientos trágicos. De resultas del combate del Pilar, donde Francisco Aldao --el hermano del Fraile Aldao-- halló la muerte, el Gobernador Coronel Juan Agustín Moyano luego de la batalla de Los Barriales, se refugió en la casa de su pariente Juan Cornelio Moyano, quien lo entregó a sus enemigos, los que a su vez en Octubre de 1829 lo condenaron a muerte.<sup>7626</sup>

También en La Rioja, perteneciente al subsistema político Central, y por cuya supremacía política competían Buenos Aires y Córdoba, se dieron conflictos intra-oligárquicos, no obstante la consabida solidaridad clánica.<sup>7627</sup> La discordia entre los linajes de los Dávila y los Villafañe, que había renacido a fines del siglo XVIII, rompiendo la llamada concordia entre las elites, se perpetuó a lo largo del siglo XIX. Como consecuencia de la montonera desatada por el Fraile Aldao a fines de 1820, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo le escribía al General Martín Miguel de Güemes que La Rioja se había

"...despoblado enteramente después de dos saqueos horribles; no quedando un alma a excepción de algunas mujeres pobres que no tienen como trasladarse; las familias mas respetables están sembradas por la campaña y los pueblos más cercanos, y nadie vuelve a sus hogares mientras existan en su territorio esas fieras que no hay consideración que los contenga".<sup>7628</sup>

A raíz del enfrentamiento de Facundo Quiroga con Nicolás Dávila, José Inocencio Moreno le informaba a Facundo en abril de 1824 "...Inmediatamente procedí yo: en este Departamento a la deposición del Juez de Minas Don Domingo Dávila y del [Juez] Pedáneo Manuel Gordillo por las relaciones de parentesco y demás que tienen estos con los Dávilas".<sup>7629</sup>

El federalismo dictatorial, de la contra-ola rosista se caracterizó por una centralización del poder con cabecera en Buenos Aires y por un alto grado de mitificación de las estructuras formales republicanas.<sup>7630</sup> El jurista e historiador Dalmacio Vélez Sársfield,<sup>7631</sup> llegó a manifestar que

"...durante la sangrienta tiranía de Rosas, existían en la República las formas de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿y quién se atreverá, señor Presidente, a decir que aquello era una República?"<sup>7632</sup>

El Diputado Nacional por Tucumán Delfín Gallo,<sup>7633</sup> recordaba que

"...cuando la tiranía de Rosas bañaba en sangre a los pueblos argentinos, la República Argentina se llamaba también República; las formas republicanas se llenaban; el Poder Ejecutivo se transmitía en períodos determinados, a pesar de que siempre era la persona de Rosas la nombrada, los cabildos hacían sonar sus campanas a fin de convocar al pueblo para que nombrara sus legisladores; existían también jueces".<sup>7634</sup>

Y el Senador sanjuanino Rafael Igarzábal, refiriéndose a las provincias que constituyeron la Confederación Argentina, sostenía que luego de la batalla de Caseros (1852), al dictarse la Constitución, "...salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la tiranía".<sup>7635</sup>

### Capítulo III-E-18      **Crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial (1884).**

#### **Índice**

- R-I      Arbitraje presidencial, *putschs* cívico-militares, autonomías provinciales y cuestión sanjuanina en Argentina (1884)
- R-II      Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado.
- R-III      Conflictividades internas (guerras de sucesión provincial) y conflictividades externas (guerras de sucesión nacional).
- R-IV      División en el seno del oficialismo como causa de la crisis.
- R-V      Avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial.
- R-VI      Contienda electoral como violencia latente.
- R-VII      Motivaciones del *putsch* y del crimen: la personalidad de la víctima y de los victimarios y las prácticas políticas vitalicias y nepóticas.
- R-VIII.      Naturaleza política de los ejecutores del *putsch* y del crimen.
- R-IX.      Secuelas del crimen político.

#### **R-I      El arbitraje presidencial, los *putschs* cívico-militares, las autonomías provinciales y la cuestión sanjuanina en Argentina (1884)**

Las crisis de violencia, extremos de un *continuum* conflictivo mezcla de rivalidad, rencor o venganza, fueron la materia prima que nutrió el análisis histórico acerca de los regímenes oligárquicos, y de sus derivados los *putschs* cívico-militares. Algunos estudios se redujeron a analizar el origen de los conflictos desde una perspectiva etno-socio-estructural (antropología social, materialismo cultural y sociobiología);<sup>7636</sup> otros a hacerlo desde una perspectiva religiosa y ritual;<sup>7637</sup> los más a practicarlo desde una perspectiva

psico-cultural;<sup>7638</sup> y recientemente, en la disciplina de Relaciones Internacionales, aproximarse al objeto de estudio desde una perspectiva neo-realista.<sup>7639</sup> Más aún, ciertos estudios fundaron sus análisis en modelos deterministas o fatalistas y otros más recientes en teorías probabilistas.<sup>7640</sup> A excepción de los recientes trabajos de León Solís (2002) y Di Meglio (2006), la historiografía científico-política no ha alcanzado aún a vertebrar la relación entre las rebeliones de elite y las de la plebe y las masas, así como la íntima conexión que se dio en el pasado entre dichas rebeliones de elite (putschs, ajusticiamientos y crímenes políticos); y la naturaleza oligárquica de los regímenes políticos, militares, electorales y judiciales coetáneos.

Con respecto al período de la revolución y el caudillismo, la historia argentina del siglo XIX cuenta con numerosos casos paradigmáticos [Liniers (1810), Moreno, Grigera (1811), Álzaga (1812), Álvarez Thomas (1815), Tagle (1823), borrego (1828), Quiroga (1829)].<sup>7641</sup> Y con relación al cotejo con los regímenes militares, electorales y judiciales coetáneos este tipo de análisis nos ha llevado a buscar explicaciones teóricas más profundas.<sup>7642</sup> Estas crisis nos han llevado a formular una serie de interrogantes, a propósito de la transición política en San Juan, en la segunda mitad del siglo XIX, tales como:

a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía derivar en una oposición violenta o una revolución desde abajo?;

b) ¿las fracturas o desajustes pre-modernos o genéticos, las rivalidades y las venganzas en el seno de una elite y los efectos de indiferenciación que estas producían guardan relación con los climas de beligerancia política y el origen de los putschs cívico-militares?;

c) ¿los crímenes y tragedias políticos obedecían a pautas, conductas o disposiciones psico-culturales (venganza, odio, rencor, etc.) heredadas de sus predecesores, a un efecto de contagio o emulación con las provincias o países vecinos, o a una compleja relación política triádica entre las facciones provinciales en conflicto (moderadas y radicalizadas) y el estado nacional como tercer actor?

y d) ¿los crímenes políticos en Uruguay (Díaz, 1858; Flores, 1863; y Berrondo, 1863); en San Juan (Benavídez, Virasoro, Aberastain y Videla); en Córdoba (Posse); en Entre Ríos (Urquiza, 1870); en Santa Fé (Cullen); en Bolivia (Yáñez, 1861; Córdoba, 1861; Belzu, 1871; y Morales, 1872);<sup>7643</sup> y en Paraguay (Gill, 1877); los golpes de palacio ocurridos en Corrientes (1881) y Santiago del Estero (1882, 1884); y el clima de atentados vigente en el mundo a partir del asesinato del Zar de Rusia Alejandro II, en 1881, jugaron algún rol con el frustrado golpe criminal ocurrido en San Juan en 1884?.

En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar las comparaciones internas y externas y la emulación con el pasado, las conflictividades internas (cuestiones sucesorias provinciales) y las conflictividades externas (cuestiones sucesorias nacionales), las motivaciones del putsch y del crimen (personalidad de la víctima y prácticas políticas vitalicias y nepóticas), los avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, el régimen electoral, la naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen, y las secuelas del crimen, entre ellas la vacante en el Senado Nacional.

En la década del 80, si bien la estructura política de San Juan no había variado sustancialmente, las condiciones económicas y político-sociales del país en su conjunto habían cambiado radicalmente, debido a su definitiva unificación y organización políticas y al relativo progreso material impuesto a su infraestructura física.<sup>7644</sup> Pero cuando la elite

dominante Sanjuanina se había reorganizado bajo un régimen más abierto y dinámico, de relativos vínculos familiares cruzados,<sup>7645</sup> y ya nadie creía que con la Organización Nacional en marcha el pasado de guerras civiles y prácticas de horror pudiera repetirse, la muerte volvió a sus andanzas en la persona del ex-Gobernador y entonces Senador Nacional Agustín Gómez.<sup>7646</sup> A semejanza de Salta, Corrientes y Santiago del Estero, donde se habían experimentado putschs político-militares, San Juan contaba entre las filas de sus activistas políticos, con elementos de la vieja política caudillesca, sanguinariamente radicalizados, con vasta experiencia en las Montoneras de la década del 60.<sup>7647</sup>

## **R-II Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado.**

El crimen político en sí dio lugar a interpretaciones de todo tipo. Si bien el asesinato de Gómez no tuvo la repercusión del que otrora alcanzaron los crímenes de los ex-Gobernadores de San Juan: Benavídez, Virasoro y Aberastain, y el del Gobernador de Entre Ríos y ex-Presidente de la Confederación Argentina, Gral. Justo José de Urquiza; el escritor y ensayista y entonces embajador Miguel Cané,<sup>7648</sup> comparaba el trágico suceso de San Juan con el ocurrido en la misma época en el Sudán Anglo-Egipcio. Reflexionando desde Viena, en carta a Roca, Cané manifestaba que

"...mientras los árabes degüellan las guarniciones rendidas de Jinkat [Trinkitat], los germanos [sic] hacen saltar con la dinamita las estaciones centrales de Londres, los anarquistas asesinan en media calle en Viena o los agentes de la autoridad, allá en San Juan, en un rincón perdido del mundo, las mismas pasiones brutales se abren camino y sobre toda la tierra, es precisamente la perversidad humana que se muestra como el principal vínculo de solidaridad de la especie. Bonito vínculo y soberbia especie!".<sup>7649</sup>

Sin duda, las comparaciones de Cané carecían de rigor académico. Mal podía compararse la matanza de soldados egipcios cometida por la secta Musulmana de los Mahdistas en el Sudán, la violencia practicada por los católicos Irlandeses contra la dominación Británica o los múltiples atentados ejecutados por los anarquistas en todo el mundo, con el peculiar crimen cometido en San Juan.<sup>7650</sup> Cané explicaba el crimen de Gómez no por la naturaleza oligárquica del régimen político vigente sino por un factor psico-cultural, el proceso de sugestión mimética de que habla Girard (1995) cuando analiza el drama Julio César, de Shakespeare, pues sostenía que los sanjuaninos tomaban "...como un título de gloria las barbaridades de sus antepasados y creen honroso imitarlos".<sup>7651</sup>

En efecto, San Juan --provincia donde la hegemonía política se la disputaban las autoridades centrales (Liberalismo Mitrista y Autonomismos Roquista y Juarista)-- había sido en la década del 50 la provincia más castigada por la anarquía provocada por la conflictividad interna y externa, el caudillismo y el crimen político. Sus gobernantes, Nazario Benavídez, José Antonio Virasoro y Antonino Aberastain murieron bajo el llamado "destino Sudamericano", falleciendo el último en la trágica Rinconada del Pocito.<sup>7652</sup> Y en la década del 70, el Gobernador Valentín Videla Lima también fue víctima del mismo infausto destino.<sup>7653</sup>

Dominado también por el determinismo físico o climático del pensamiento Sarmientino y Alberdiano, tomado prestado de Montesquieu,<sup>7654</sup> Cané sugería la existencia de causas fundadas en fracturas genético-ecológicas,<sup>7655</sup> pues

"...sea la naturaleza ingrata del suelo, sean otras condiciones etnográficas que se me escapen, el hecho es que no he conocido un Sanjuanino con calor generoso en el corazón, Inteligentes muchos de ellos,...hábiles, todo lo que se quiera, pero con esa alta serenidad moral que dá una naturaleza benévola, nunca. Tome los tipos principales: Sarmiento, Carril, Rawson, recuerde la sequedad de alma de esos hombres tan bien dotados y me dará la razón".<sup>7656</sup>

### **R-III Conflictividades internas (guerras de sucesión provincial) y conflictividades externas (guerras de sucesión nacional).**

Por el contrario, para el agudo punto de vista del Diputado Nacional Juan P. Albarracín,<sup>7657</sup> las causas del putsch y del crimen político eran mucho más prosaicas y se asemejarían más a las expuestas por las teorizaciones de Buchanan y Tullock (1962), de Ross (1985, 1995) y de Acuña y Smulovitz (1995). En la cuestión Sanjuanina pareciera que lo central era la conflictividad interna o guerra de sucesión provincial versus la conflictividad externa o guerra de sucesión nacional (expresada en la compleja relación triádica entre los victimarios, las víctimas y el Presidente Roca, que actuaba como un tercer actor arbitrador).<sup>7658</sup>

Y para el punto de vista del director de La Patria Argentina (Buenos Aires), el Mitrista José María Gutiérrez, los crímenes fueron la consecuencia voluntaria o involuntaria de la gallinización, es decir, del efecto de mostración o efecto dominó de las asonadas o putschs militares.<sup>7659</sup> El caso particular del crimen del Senador Sanjuanino Agustín Gómez habría sido la consecuencia de intentar emular la asonada criminal por la cual el Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino fué desplazado del poder, en Abril de 1882.<sup>7660</sup> Asimismo, habría sido la consecuencia de intentar emular los prolegómenos de la intervención a Santiago del Estero, en Septiembre de 1882, resultas de la cual terminó destituido el Gobernador Pedro C. Gallo.<sup>7661</sup> Para el oficialismo Sanjuanino, la coalición opositora amotinada (Napoleón Burgoa,<sup>7662</sup> Manuel Moreno, Juan José Videla, Secundino Navarro y Benjamín Bates),<sup>7663</sup> atentó contra la Situación porque "...restablecida nuestra buena inteligencia con Vd. [Roca]",<sup>7664</sup> perturbada por los coqueteos que Gómez había practicado con los Rochistas,<sup>7665</sup> "...vieron fracasar todos sus planes de predominio basados en las intrigas que ante Vd. sustentaban contra nosotros".<sup>7666</sup> Pero cuando los victimarios han visto la protección que el Presidente Roca dispensaba al Gobierno de Anacleto Gil (h),<sup>7667</sup> y que eran "...mentidas las promesas de quienes a la postre resultaron amotinados, que les decían que contaban con la ayuda presidencial, entraron a odiar tanto al oficialismo provincial como al Sr. Presidente".<sup>7668</sup>

### **R-IV La división en el seno del oficialismo como causa de la crisis.**

El origen del desencuentro entre el gobierno federal y las autoridades de la provincia de San Juan en la década del 80 obedeció al creciente proceso de faccionalización cruzada y de complejidad política a que había dado lugar los nacimientos del Autonomismo Sanjuanino y del autonomismo Nacional y a la acentuación de la naturaleza oligárquica del régimen político.<sup>7669</sup> La división en el situacionismo u oficialismo --cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los Regeneradores-- que se había dado en mayo de 1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación Avellaneda, se repitió tres años después, el 2 de enero de 1881, cuando se

convocó a elecciones de Gobernador. Para el período gubernativo que se iniciaba en mayo de 1881, se contemplaban sólo dos candidaturas. Del seno mismo del Club del Pueblo nuevamente fue elegido un candidato Mitrista, José Pedro Cortínez, hermano del Ministro de Hacienda de la Nación Santiago Cortínez,<sup>7670</sup> "...sujeto respetable y muy querido en la provincia", y otro el autonomista Dr. Anacleto Gil (h),

"...un joven estimable por su conducta privada,..., y si bien figura en las filas del gran partido nacional autonomista, carece del tino político, que sólo lo dan en esta materia, la experiencia, los años, y la tradición".<sup>7671</sup>

Pero esta división en el seno del Club del Pueblo fue sólo momentánea, por cuanto la coalición Mitrista formada por Cortínez y sus parciales,<sup>7672</sup> desistió de su ambición política. El abandono de Cortínez obedeció a que era imposible luchar con éxito contra Agustín Gómez, un líder político de inmenso carisma y popularidad, "...que desde su llegada a esta se inclinó al Dr. Gil".<sup>7673</sup> La opción de Gómez a favor de Gil, protagonista de una de las alas en que quedó dividido el Club del Pueblo, fue elegida porque vio que "...todos los Mitristas apoyaban a Cortínez".<sup>7674</sup> Finalmente, para Mardoqueo J. Olmos,<sup>7675</sup> los trabajos que debían dar por resultado la división del Partido Situacionista habían comenzado desde la llegada a San Juan del Senador Nacional Rafael Igarzábal,<sup>7676</sup> afín al Irigoyenismo y al Roquismo, en Octubre de 1882.<sup>7677</sup> Esta división se concretó entre aquellos "...que siguen las políticas falsas y traidoras, de Gil y Gómez [pro-Rochistas], de los [que son] amigos de Vd. [Roquistas]".<sup>7678</sup>

Respecto a la conducta que el Mitrisismo observaba en la cuestión sucesoria provincial, en el año anterior al crimen, 1882, nada mejor que reproducir las expresiones del Senador Nacional Rafael Igarzábal.<sup>7679</sup> Este le prometía al Gobernador Anacleto Gil,

"...que lo ayudaríamos en su gobierno en todo con tal que entregase el gobierno futuro a persona de nuestra confianza [del Mitrisismo], la que indicada de antemano, sería la bandera con que trabajaríamos ante nuestros amigos y ante la Provincia".<sup>7680</sup>

Como Gil había contestado que "...eso dependía del Comité del Partido [Autonomista]", Igarzábal le replicó "...que eso era disculpa pues los dos sabíamos como se componía el comité y como se trabajaba en él".<sup>7681</sup> Al proponerle Igarzábal como candidato a Gobernador a Burgoa, Gil le dijo que Burgoa "...no tenía ni un solo voto por carecer de capacidad y no ser una personalidad suficiente",<sup>7682</sup> al sugerirle al Oficial de la Guardia Nacional Román Videla,<sup>7683</sup> "...me contestó que no tenía opinión ni posición, etc."; <sup>7684</sup> al recomendarle a Rosauro Doncel,<sup>7685</sup> "...me contestó que sería dividir el partido completamente";<sup>7686</sup> y, finalmente, al proponerle a su hermano, el Dr. Severo Igarzábal, "...me dijo que aunque le reconocía carácter, ilustración y posición o personalidad, sería impopular por haber estado siempre retraído de la política".<sup>7687</sup>

A partir de que Agustín Gómez dejara la Gobernación y asumiera el cargo de Senador Nacional, en 1882, y la crisis sucesoria o cuestión presidencial se pusiera en el tapete, su relación con Roca se deterioró, debido a la influencia que sobre él ejercía el Círculo Republicano (Rochismo).<sup>7688</sup> La actitud del Senador Agustín Gómez, hostil al Gobierno Nacional, era para el Gobernador Anacleto Gil "...sin duda originada en gran parte por la influencia del círculo republicano [Rochismo], con muchos de cuyos miembros tiene Gómez íntima amistad".<sup>7689</sup> Tan minada fué quedando la base política de Gómez, que cuando éste volvió a San Juan, no encontraría, a juicio del Diputado Nacional

Juan Pablo Albarracín, "...prosélitos contra el Sr. Presidente".<sup>7690</sup> Aún en la hipótesis de que saliera electo un Gobernador afecto a Gómez, Albarracín sostenía que "...al día siguiente de recibirse del mando, tendría inevitablemente que ponerse de acuerdo con el Sr. Presidente, si no quería venir al suelo por su propio peso".<sup>7691</sup>

En oportunidad de renovarse la Legislatura, en 1883, el Gobernador Anacleto Gil, de acuerdo con Agustín Gómez, Manuel M. Moreno,<sup>7692</sup> Ramón Castañeda,<sup>7693</sup> y su cuñado Juan Pablo Albarracín, cambió en las listas

"...el nombre de Mardoqueo Olmos [primo de Napoleón Burgoa], por el de [su propio primo] Agustín Recabarren, hermano de [el Jefe de Enganche] Patrocinio,...instrumento ciego e inconsciente de Agustín Gómez, con quien lo ligan vínculos inquebrantables".<sup>7694</sup>

Olmos fué el único cambiado porqué, según su primo Burgoa en carta a Roca, "...es el único definido y conocido como amigo de Vd. [Roca]".<sup>7695</sup>

## **R-V Avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial.**

A comienzos de 1883, el Inspector de Irrigación y Agricultura de San Juan Don Napoleón Burgoa, mediante la intercesión del Edecán del Presidente, Palemón González, había conferenciado largamente con Roca, quien le dio el encargo de formar un nuevo partido provincial que se opusiere en todo a la política sospechosamente Rochista de Agustín Gómez y de Anacleto Gil.<sup>7696</sup> Dadas las circunstancias, y ante la eventualidad de disturbios, Burgoa creía conveniente que vinieren de Mendoza fuerzas de línea.<sup>7697</sup> San Juan carecía en ese entonces de guarnición militar alguna, salvo aquella proporcionada por la Guardia Municipal y la Oficina de Enganche, ambas de escaso poder de fuego. Más aún, siguiendo aparentemente las instrucciones de Gómez, el Gobernador Gil adoptó medidas drásticas, suspendiendo legisladores.<sup>7698</sup> Y desde la expulsión de los Diputados Manuel J. Quiroga y Francisco D. Aguilar, "...comenzaron varios de los de la fracción Autonomista a desconfiar de [Rafael] Igarzábal y a renegar de la incapacidad de [Manuel María] Moreno".<sup>7699</sup> También se vulneraba la independencia del Poder Judicial manipulando la designación de los magistrados y destituyendo a jueces. Carlos Doncel había sucedido en el Juzgado Federal a su pariente político Nataniel Morcillo,<sup>7700</sup> "...y se lo ha transmitido a un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a [Rafael] Igarzábal".<sup>7701</sup> A fines de 1883, el Gobernador Gil declaró

"...cesantes el Jurado actual y nombrando otro a su amañío y sin juicio político y consiguiente destitución de los principales miembros del Poder Judicial, que no son partidarios del Gobernador".<sup>7702</sup>

En efecto, el Juez Severo Igarzábal, hermano del mitrista Senador Nacional Rafael Igarzábal, aunque siguió conservando sus dos sueldos en el Colegio Nacional,<sup>7703</sup> fue destituido del cargo de Juez por su agresiva conducta como redactor del periódico La Unión,<sup>7704</sup> y por insultar en un escrito, donde tenía entablado juicio contra El Zonda,<sup>7705</sup> "...a la situación, al Juez [Sánchez] Benavidez y al redactor de El Zonda, con quien tiene añejo pleito de injurias".<sup>7706</sup> Vicente C. Mallea lo prevenía a Roca, que

"...ni [Anacleto] Gil, ni ninguno de los hombres de importancia de la situación le contestan ni hacen caso a Igarzábal, cuya conducta en el Juzgado, en la prensa y en

todas partes no diré ya es indigna, sino escandalosa. No queda casi persona aquí a quien no haya tratado de difamar y con quien no haya tenido desagradados".<sup>7707</sup>

## **R-VI Contienda electoral como violencia latente.**

Tal como ocurrió en Santa Fe con Simón de Iriondo y luego en Santiago del Estero con Pedro C. Gallo, el Senador Nacional Agustín Gómez amenazaba con volver a disputar electoralmente la Gobernación de San Juan. Esta violencia latente siguió in crescendo en las elecciones legislativas de Octubre de 1883. Se trataba de reemplazar a dos senadores provinciales correspondientes uno al distrito de Jáchal, Don Tomás Álvarez, que había fallecido; y otro al de Caucete, Don Clemente Videla, quien había renunciado.<sup>7708</sup> Aunque electoralmente triunfantes, gracias al fraude practicado, la coalición oficialista o situacionista tenía que estar, a juicio de Burgoa, "...con el arma al brazo e infundiendo el terror por todas partes porque la opinión los abandona y desprecia".<sup>7709</sup>

## **R-VII Motivaciones del putsch y del crimen: la personalidad de la víctima y de los victimarios y las prácticas políticas vitalicias y nepóticas.**

La víctima propiciatoria, Agustín Gómez, elegida como chivo expiatorio --tal como el Julio César de la antigüedad clásica incriminado por la supuesta descomposición de las instituciones republicanas-- contaba con una personalidad dotada de un liderazgo natural, pues en 1881 había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del Porvenir", sancionado una nueva Constitución, manipulado a sus aliados para sortear el impedimento de elegir como Senador al Gobernador saliente y, a instancias de Roca, fundado un partido político propio "...que elevó al gobierno y con el cual está gobernando hasta hoy, desde [Anacleto] Gil (h), a Carlos Doncel,<sup>7710</sup> [Vicente C.] Mallea,<sup>7711</sup> [Juan P.] Albarracín, y la Guardia Municipal".<sup>7712</sup> Esta situación vitalicia y nepótica llevó a que un mes antes, Napoleón Burgoa, un dirigente político perteneciente a la facción radicalizada de la coalición liberal opositora, le expresara a Roca, que "...todo está ya repartido: Vice-Gobernación, Diputaciones, etc. y por que todo sería poco para la familia reinante".<sup>7713</sup> Y el mismo día, en carta al Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo, Burgoa le expresaba que la sincera amistad que le profesaba al Gral. Roca le prescribían el deber de "...evitar por medio de la unión de los dos Comités la elección de Vice-Gobernador en la persona de [Vicente] Mallea, porque esto comporta la entronización de una familia en el Poder".<sup>7714</sup> Estas apreciaciones las confirman una carta elevada por Carlos Doncel, al propio Burgoa, donde le cuenta que "...ayer me manifestó que también entraba en sus propósitos luchar contra la prepotencia de una familia, la de Gil".<sup>7715</sup> Es de suponer que para esa época, Roca aceptaba gustoso las prevenciones contra el nepotismo, expresadas claramente por Burgoa, quien aparentemente no pertenecía al núcleo abigarradamente oligárquico de los Gil y los Merlo Quevedo,<sup>7716</sup> y pretendía o simulaba profesar un republicanismo a ultranza.

Burgoa era, para el más luego notorio político Juarista Dr. Pedro A. Garro,<sup>7717</sup> precisamente "...uno de los pocos hombres que aquí se encuentra en condiciones de encabezar un partido y conducirlo a la lucha con un éxito más o menos probable".<sup>7718</sup> Entre sus disposiciones psico-culturales, Burgoa "...es franco, generoso, leal y cuenta con elementos no despreciables".<sup>7719</sup> En realidad, Burgoa habría contado, para Garro, con

aquella figura híbrida del jacobino, tan sabiamente descripta por Bodei (1995), que al aunar al intelectual y al agitador en una sola persona, congregaba con audacia inaudita lo que la tradición política había mantenido distanciado, "...miedo y virtud, despotismo y libertad, fuerza y razón, terror y filosofía, muerte y regeneración".<sup>7720</sup> Sin embargo, para Vicente Mallea, Burgoa "...está lleno de ilusiones acerca de su propia personalidad".<sup>7721</sup> Según Mallea, unos cuantos enemigos del gobierno que a la postre resultaron ser los integrantes de la facción radicalizada de la coalición opositora, es decir los que se amotinaron (Juan José Videla, Manuel María Moreno, Secundino J. Navarro y Benjamín Bates),

"...sin fe en nada, sin otra ley que alcanzar posiciones políticas, sin valer alguno en la provincia, creyendo en la eficacia de la influencia de Burgoa con Vd. y esperando por ese medio verse de un momento a otro dueños del poder aquí, lo azuzan y alucinan a Burgoa llamándolo su Jefe, sin cuidarse de ocultar el desprecio que le tienen y la mala voluntad con que miran su acceso a otra cosa que no sea el gobierno en el cual cuentan con manejarlo".<sup>7722</sup>

Y en otra carta, cuatro días después, Mallea le advierte a Roca acerca de la verdadera personalidad de Burgoa, pues "...la fiebre de ser caudillo lo va a consumir".<sup>7723</sup> También le revela Mallea a Roca, con una prosa impecable, la complicada y progresiva comedia de embustes e imposturas, pues

"...todos los anteriormente nombrados [Videla, Moreno, Navarro y Bates] y algunos otros de menor significación, por lo cual no los clasifico, le dijeron que debía ser su director político [operador] al darle una pretendida misión cerca de Vd., y él ha tomado a lo serio la broma, sin reparar en que tal palmeada de hombro tiene por único origen el creerlo de la confianza de Vd. el único que puede darles importancia con su protección. Me parece que en materia de engaños van de bueno a bueno: ellos le mienten [a Burgoa] al decirle Jefe, él [Burgoa] los engaña asegurándoles así lo creo firmemente, la ayuda presidencial para sus planes. Introduzca Vd. estos hombres a nuestro Comité y tendría el campo de Agramante".<sup>7724</sup>

## **R-VIII.- La naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen.**

Finalmente, a mediados de Noviembre de 1883, cual un presagio, una conspiración o gallinicidio contra la vida del Gobernador Gil fue descubierta, cuyos detalles constan en un sumario instruido por la Policía de San Juan.<sup>7725</sup> La creciente rivalidad, al interior del Autonomismo Sanjuanino, como era de esperar, estalló trágicamente tres meses más tarde. Un putsch revolucionario, desencadenado el 6 de febrero de 1884, terminó con la vida del Senador Nacional Agustín Gómez. Inmediatamente después de ocurrido el luctuoso suceso, que fue percibido por el pueblo sanjuanino como una acción brutal y repugnante, se desató la cacería del o de los culpables del hecho.<sup>7726</sup> Ninguna duda cabía, según Carlos Doncel,<sup>7727</sup> que los ejecutores del crimen fueron Moreno y Burgoa,

"...por medio de sus propios sirvientes y bajo su inmediata dirección,..., alentados y quizás auxiliados eficazmente por prohombres del Círculo que se llama Nacionalista [Mitrista], y que han contribuido también como cómplices Castañeda, Igarzábal, Juan L. Sarmiento, Aráoz, Bates y muchos más".<sup>7728</sup>

Cabía también la posibilidad que el crimen obedeciera a una conjura de los elementos más radicalizados y violentos de la coalición opositora (Elizondo, Carrizo, Méndez, Correa, Balmaceda, Cuello).<sup>7729</sup> Es decir, de aquellos elementos que al decir de Bodei (1995), padecían de una familiaridad obsesiva con la muerte.<sup>7730</sup>

La conspiración en principio se habría propuesto producir sólo un putsch que derrocar a las autoridades provinciales y no que las eliminara físicamente. En ese caso era admisible que las motivaciones de los ejecutores materiales del crimen se debieran a un desmedido afán por promoverse personalmente en las filas de la oposición o al temor de aparecer mostrando debilidad en el ámbito de los conjurados. Es de recordar en ese sentido, que en el crimen perpetrado contra el ex-Presidente de la Confederación Gral. Justo J. de Urquiza, el líder de la sublevación Ricardo López Jordán también había negado que su intención fuera el crimen. La principal autoría material fue atribuida a Simón Luengo, un cordobés de vasta experiencia putschista y de frondoso prontuario criminal, quien a raíz de su participación fue asimismo ultimado.<sup>7731</sup> En cuanto a la autoría ideológica o intelectual del crimen de San Juan, el periodismo no fue unánime en cuanto a la identidad de los culpables. Mientras algunos buscaban culpas entre los Autonomistas autores del putsch (Burgoa y Moreno), otros como los corresponsales de La Prensa, El Mosquito y Figaro,<sup>7732</sup> se hacían eco de la declaración del testigo Javier Baca contra los Mitristas, en especial contra el Senador Igarzábal.<sup>7733</sup>

El trágico fin de Gómez, le hizo decir a Burgoa,<sup>7734</sup> el principal sospechado del crimen, en una muy significativa y desgarrante carta dirigida a su más íntimo amigo Palemón González, quien era asimismo el Edecán del Presidente,

"...Maldita política/Desde que me metí en ella, parece que una maldición me persigue, hasta que al fin todo lo he perdido y perderé de seguro hasta el honor [bastardilla de mi autoría]. Todo está en que Juan Pablo [Albarracín] y Mallea quieren hacerme declarar judicialmente cobarde asesino y hasta me condenarán como tal".<sup>7735</sup>

Pese a las amenazas contra su vida, Burgoa resolvió esperar en la localidad de Caucete, para entrar a la ciudad y presentarse a aclarar su actuación. Sin embargo, la partida policial lanzada tras su captura no le dio respiro, teniendo que adoptar --a diferencia del romano Bruto que optó por el suicidio-- el camino del exilio.<sup>7736</sup> Años más tarde falleció en Buenos Aires, donde Roca le había hecho otorgar un cargo en el Senado de la Nación.<sup>7737</sup> Esta actitud de Roca, condescendiente con el principal imputado por el crimen de Gómez revelaría el grado de culpabilidad que la conciencia de Roca manejaba, por el mal precedente que su conducta en el caso del Gobernador de Corrientes Antonio Gallino había producido en las demás provincias. La persecución no terminó con Burgoa, pues a juzgar por el Juez de la causa Dr. Numa Sánchez Benavidez,<sup>7738</sup>

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los mandatarios cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra algunas personas que eran inocentes".<sup>7739</sup>

En su testimonio de lo visto y observado en el fatídico mes de Febrero, el Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo concluía que ambos: el plan del asesinato y del putsch, constituían una unidad indisoluble, donde no existieron una facción moderada y otra radicalizada, que ambos planes habían sido preparados por Manuel Moreno y Napoleón Burgoa, y que si bien Burgoa

"...trata de hacer recaer la responsabilidad de la muerte de Gómez en Moreno, como Director del Movimiento, según un Manifiesto publicado en Chile, yo considero ese descargo ridículo y hasta pueril, tratándose de un hombre como Burgoa que se ha encontrado allí hasta oír los últimos disparos de armas de esa noche fatal".<sup>7740</sup>

En ese manifiesto exculpatorio publicado en Chile, Burgoa

"...pone a Dios por testigo, que su idea primordial era salvar la vida de Gómez. Hay manifiestos imprudentes, y este es uno de ellos. Si nadie pensó en atentar a la vida de aquel hombre, mal pudo ocurrírsele a Burgoa que lo primero era atender a la salvación de aquella existencia".<sup>7741</sup>

### **R-IX.- Secuelas del crimen político.**

A propósito de la vacante producida en el Senado Nacional por la muerte de Gómez, una ristra de candidatos se hizo presente de inmediato promovidos por intereses de lo más disímiles. Entre ellos Juan Pedro Albarracín, Hermógenes Ruiz, y encubiertamente el mismo Vicente C. Mallea.<sup>7742</sup> En San Juan, la candidatura a Senador Nacional del Ing. Guillermo Villanueva,<sup>7743</sup> estrechamente vinculado a los intereses ferroviarios ingleses, y apoyado por el Gobernador Juárez Celman, "...es sino imposible, difícilísima, por ser el candidato muy mal querido de esta sociedad y sin relaciones políticas entre nosotros".<sup>7744</sup> Al año del crimen, y aún no recuperados de las secuelas provocadas por la muerte de Gómez, el Diputado Nacional Juan P. Albarracín le confesaba a Luis del Carril,<sup>7745</sup> que los Autonomistas estaban también muy divididos

"...algunos se han inscripto y votaron por Juárez: Ignacio Sarmiento, Román Videla, Numa Benavídez, [Saturnino o su hermano] Aráoz, con estos nos hablamos y estamos en buena relación; otros son Irigoyenistas: [Benjamín] Bates, [Juan E.] Balaguer y Juan Luis Sarmiento, no nos vemos y nos hacen la guerra por su libertad; otros [Rochistas]: [Manuel] Moreno, [Ramón] Castañeda, Guillermo Sarmiento, Pintos, no nos hablan ni hay como ponernos en contacto".<sup>7746</sup>

En enero de 1885, con las perspectivas de la sucesión presidencial en ciernes, el Gobernador Carlos Doncel --quien había sustituido en el mando a Anacleto Gil (h) luego del frustrado putsch de Febrero de 1884-- se cubría informando que "...han empezado a moverse los politiqueros y se sienten ya las primeras guerrillas de chismes, amenazas y billetes del Banco de la Provincia [de Buenos Aires]".<sup>7747</sup> Este 'novedoso' elemento (el dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires), hasta entonces no generalizado, pero reestablecido por la inescrupulosidad del gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha, y la necesidad de combatir el fraude electoral, se reparte

"...entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por mis amigos pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han asignado y abandonarán al encanto comprador".<sup>7748</sup>

Pocos años más tarde, los putschs y los crímenes políticos en Argentina vuelven por las suyas, pues en 1887 y 1889, durante el gobierno de Juárez Celman, los Gobernadores de Tucumán y Mendoza fueron sangrientamente derrocados.<sup>7749</sup> Y con

posterioridad a la Revolución del 90, la violencia política se extendió a todo el país alimentada por el fraude electoral sistemático. Fueron asesinados, en La Plata en marzo de 1894 el ex-Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos J. Costa,<sup>7750</sup> en Santiago del Estero, en 1896, el Diputado Nacional Pedro García, por la policía de su provincia;<sup>7751</sup> y más luego el periodista Arrízola.<sup>7752</sup> El mismo año de 1896, se registró en San Luis el asesinato del Jefe Político del Departamento de Ayacucho, Dr. Julio Daract Barbeito,<sup>7753</sup> acontecido en la localidad puntana de Quinas, a manos de la policía del Gobernador Lúndor Quiroga. En Catamarca fue asesinado el cronista Barrionuevo; y en Córdoba, el periodista Loza.<sup>7754</sup> A fines del siglo XIX, la violencia política pareciera ser que se trasladó al litoral. En diciembre de 1897, fue asesinado el Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli.<sup>7755</sup> Cuatro años más tarde, en Noviembre de 1901, el conflicto en Santa Fé se acentuó, pues el Jefe Político del Departamento de Caseros, José R. Saurit, también fue asesinado.<sup>7756</sup> A propósito de la muerte de Saurit, La Prensa invitaba a la sociedad argentina a recordar a

"... 'La Cadena' de Córdoba; 'El Tiro' de Salta; 'Los Crudos' de Rosario y otras agrupaciones que llevaron el luto a tantos hogares y que han dejado en la historia una fama solo comparable a la que adquiriera la situación anterior a Caseros".<sup>7757</sup>

Al año siguiente, en 1902, en San Juan, es asesinado por la policía el periodista José F. Echevarría.<sup>7758</sup> Doce años más tarde, en febrero de 1914, Santa Fé vuelve a ser epicentro de la violencia política. De resultados del enfrentamiento entre dos políticos primos hermanos,<sup>7759</sup> el hermano del Jefe Político Demócrata Progresista de Rosario, Teodoro Silva Chávez, es asesinado por el Comisario Severo Peralta.<sup>7760</sup> Otros veinte años más tarde, en las décadas del 20 y del 30 la violencia retornó nuevamente a Cuyo. Fueron asesinados: en 1922, el Gobernador Radical de San Juan Amable Jones,<sup>7761</sup> y siete años después, en 1929, el ex-Gobernador de Mendoza Carlos Washington Lencinas,<sup>7762</sup> como prolegómeno inmediato al putsch cívico-militar de 1930, que derrocara al Presidente Hipólito Yrigoyen. Otros doce años más tarde, en 1941, y por resisitir al fraude, fue asesinado el Diputado Radical mendocino Ernesto Matons.<sup>7763</sup>

En resumen, el putsch y el crimen político acontecidos en San Juan, que aquí hemos tomado como paradigmáticos, se inscriben en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción moderada. La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad.

## Capítulo III-E-19.-- **Escarmientos anti-sediciosos y ajusticiamientos políticos (1891)**

### Índice del Capítulo III-E-19

- S-I.- Conato sedicioso en Formosa (1891)
  - S-I-a.- Antesalas del conato
  - S-I-b.- Pesquisa e interrogatorios policiales
  - S-I-c.- Consejo verbal de Guerra
- S-II.- Liderazgo Sedicioso
  - S-II-a.- Características personales.
  - S-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados.
- S-III.- Confesión *in Artículo Mortis*.
- S-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra
  - S-IV-a.- Autocensura y escamoteo de la opinión pública
  - S-IV-b.- Derivaciones psicológicas
- S-V.- Omisión de debido Proceso
  - S-V-a.- Ausencia del derecho de defensa
  - S-V-b.- Justicia penal militar
- S-VI.- Causales de la asonada
  - S-VI-a.- Causales políticas
  - S-VI-b.- Indisciplina castrense como causal
  - S-VI-c.- Venganza como causal.
- S-VII.- Ejecución sumaria como escarmiento.
- S-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones.

### **Palabras Claves**

Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública, causales políticas, comité revolucionario de soldados, conato sedicioso, confesión *in Artículo Mortis*, Consejo Verbal de Guerra, debido proceso, derivaciones psicológicas, ejecución sumaria, escarmiento anti-sedicioso, indisciplina castrense, justicia penal militar, liderazgo sedicioso, omisión del derecho de defensa, orden pretoriano-, pena de Muerte-, pesquisa e interrogatorios policiales, secuelas del Consejo de Guerra.

### **Keywords**

Death penalty, Self-censorship, public opinion, war council, due process, military indiscipline, insurgent leadership, Firing squad, praetorian order.

### **S.- Escarmiento Anti-sedicioso y ajusticiamiento político**

Habiendo estudiado el crimen político propio del estado burocrático-oligárquico (1880-1890), cabe ahora investigar aquellos casos de escarmientos anti-sediciosos,

supuestamente de índole castrense, pero que por su naturaleza de crimen de estado merecen ser considerados como crímenes políticos. La historia de los conatos sediciosos y de las represalias sangrientas que ellos ocasionaban son acreedores --por su relevancia microhistórica y los escasos testimonios escritos que han quedado-- de toda una investigación pormenorizada.

Una vez producido en una unidad militar de frontera un conato sedicioso, se iban trabando en forma inmediata intensas transacciones y negociaciones con instancias de poder interno, tales como la Guardia de Prevención y la Mayoría del Regimiento, la Fiscalía Militar y el juzgado de instrucción, el Consejo verbal de guerra, y la Comandancia militar.

Para su estudio dividiremos el décimo capítulo en ocho apartados comenzando con las particularidades del conato sedicioso ocurrido en el Chaco Central (Formosa); continuando con la singularidad del liderazgo sedicioso; la confesión in articulo mortis del autor del mismo; y las secuelas psicológicas y comunicacionales producidas por la actuación del Consejo de Guerra; para luego emprender el estudio de las circunstancias del debido proceso; el análisis de las causales político-militares de la asonada; así como el tratamiento de la ejecución sumaria como dispositivo de escarmiento; y finalmente, estudiar las derivaciones personales y arribar así a las conclusiones del caso.

## **S-I.- Conato Sedicioso en Formosa (1891)**

### **S-I-A.- ANTESALAS DEL CONATO**

En el resto del país las réplicas de la Revolución del 90 persistían. En Saladas (Corrientes), se produce una represión de opositores y se genera lo que se conoce como **La Masacre de Saladas** (mueren Manuel Acuña, Castor Rodríguez, y Pedro S. Galarza).<sup>7764</sup> En el Rosario, en oportunidad de las elecciones convocadas en 1891, la custodia militar de los comicios produjo cruentos sucesos. Todo esto lejos de amedrentar a la tropa, "...la exasperan inoculando en ella el espíritu de resistencia y la sed de venganza".<sup>7765</sup> Y en el Territorio Nacional de Formosa --al decir de Oszlak (2004) una suerte de estado intermedio-- asiento de una economía de enclave y de un capitalismo depredador, compuesto de obrajes madereros y punta de rieles, tenían su sede en una extensa línea de fortines diversos regimientos de caballería, que servían a esta sociedad de frontera de garantía contra los malones aborígenes. Esta frontera era considerada, por su inclemencia climática y las enfermedades que provocaba (paludismo), como un destino de castigo.<sup>7766</sup>

En este contexto socio-económico y socio-cultural se produce un hecho que hasta hoy ha sido llamativamente ocultado por la prensa y por la historiografía respectiva. En efecto, a fines de septiembre de 1891, en el Regimiento 1º de Artillería, acampado en Formosa, se generó entre la tropa un conato de sedición, que sin alcanzar a consumar una rebelión fue duramente reprimido.<sup>7767</sup> Este Regimiento había sufrido --por su participación en la Revolución del Parque-- su disolución por Orden General del 14 de agosto de 1890, y sendos traslados desde Buenos Aires, primero a Resistencia (Chaco Austral), donde estuvo bajo la jurisdicción del General Antonio Dónovan; y luego a Formosa (Chaco Central) bajo la autoridad del General Napoleón Urriburu.<sup>7768</sup>

Dicho Regimiento había sido el que mas se había prodigado a los inicios de la Revolución del Parque (Buenos Aires), pues llegó a contar con cuatro piezas de artillería de marca Krupp, y su lucha de cuatro largos días se libró específicamente en el cantón o barricada de la esquina de Viamonte y Talcahuano.<sup>7769</sup> A partir de este estado de intensa crisis, por decreto del 12 de agosto de 1891 y sobre la base del Batallón de Zapadores y Pontoneros establecido en el Chaco Central (Formosa), el Ministro de Guerra General Nicolás Levalle recreó el disuelto y castigado Regimiento 1º de Artillería.<sup>7770</sup>

Los regimientos de artillería debían tener tres escuadrones, y cada uno de ellos tres baterías. Cada batería, que es la unidad táctica por excelencia, debía a su vez contar con tres oficiales y más de un centenar de soldados.<sup>7771</sup> Asimismo, cada regimiento debía contar con su Guardia de Prevención y cada batería o compañía con su detall.<sup>7772</sup> La Guardia de Prevención debía llevar cuatro libros, el de novedades y castigos, el de correspondencia, el de existencias, y el de recorridos del oficial de servicio o semana.<sup>7773</sup>

Sus jefes, que eran oficiales superiores, tanto el de la guarnición Napoleón Uriburu como el del regimiento de artillería Julio Ruiz Moreno --que frisaban en los cuarenta años largos-- otrora unidos contra el Paraguay y la Rebelión de López Jordán en Entre Ríos, estaban políticamente enfrentados desde la revolución de 1874, pues Uriburu había tomado partido por Mitre en la batalla de La Verde; y Ruiz Moreno había cerrado filas con Roca, en la batalla de Santa Rosa contra el mitrista General Arredondo. Pero en esta nueva coyuntura, no los unía el amor sino el espanto a un enemigo común, la naciente Unión Cívica Radical. Esta era la cruda realidad que padecían los cuerpos de oficiales de la mayoría de los regimientos del país, que habiendo sido afectados por las fisuras políticas del pasado, ya fuere la rebelión de Mitre en 1874 o la de Tejedor en el 80, ahora se veían forzados a cerrar filas contra la amenaza de la insurrección. De ahora en más, una nueva y honda fisura se había abierto en el seno de la oficialidad, y esta era la Revolución del 90 y sus persistentes secuelas producidas en 1891, 1892, 1893, 1904 y 1905.

El jefe del regimiento, Coronel Julio Ruiz Moreno, no se destacaba por la rigidez disciplinaria, y se había ausentado en comisión a Buenos Aires a mediados de septiembre de 1891.<sup>7774</sup> Su viaje destinado a procurar pertrechos para la nueva unidad lo realizó conjuntamente con su soldado asistente Francisco Toranzo y el Jefe de Escuadrón Capitán José M. Abogado (12-46-A), quedando al mando de la misma su segundo Jefe el Tte. Cnel. Federico López (5-5-A). Este último oficial --que en oportunidad de los sucesos de Julio del 90, estando de licencia en Córdoba, contribuyó a la represión organizando la Guardia Nacional, tarea para la cual había sido comisionado por el Gobernador José E. Garzón-- se caracterizaba, a juzgar por las referencias que dio su hermano mayor al solicitarle una beca en el Colegio Militar, por ser alto, ágil y fornido; y por las constancias registradas en el Libro de Ordenes del Colegio Militar se destacaba por haber ejercido como Cabo 1º abuso de autoridad que llegó a provocar "...resistencias y actos de insubordinación".<sup>7775</sup> Por ser egresado del Colegio Militar en 1878, y haber oficiado como profesor en 1886, López no podía ignorar lo que venía sucediendo en dicho Colegio desde la década del 70, y por ese motivo desconfiaba del nuevo cuerpo de oficiales subalternos.<sup>7776</sup> López se caracterizaba por el celo que ponía en sus funciones y por el rigor y la disciplina que pretendía imponer en una tropa y una

oficialidad subalterna convulsionada por los violentos y sangrientos hechos que les había tocado vivir en Buenos Aires.<sup>7777</sup>

En esa difícil tarea de imponer rígidos códigos disciplinarios, López descubrió en una de las baterías del escuadrón bajo el mando del Cap. Abogado un conato sedicioso, o lo que despectivamente se conocía como la antesala de una chirinada.<sup>7778</sup> Este hallazgo comenzó la noche del 24 de septiembre, cuando el soldado Roque Roldán puso en conocimiento de dicho Jefe que el soldado Julián Bargas (asistente del Cap. Abogado) lo había invitado a participar en la sublevación del Regimiento "...diciendo que ya habían muchos comprometidos y que lo ponía en su conocimiento afín de que lo evitara".<sup>7779</sup> Entre los suboficiales y soldados conjurados en el supuesto comité revolucionario de soldados y clases he podido detectar en estas actuaciones al menos a ocho (8) de ellos, que pertenecían a la primera y segunda compañía del mismo escuadrón y eran el ex cabo Felipe Miranda, y los soldados enganchados o voluntarios Julián Bargas, Francisco Toranzo, Ramón Plaza, Roque Roldán, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, todos los cuales habrían también participado el año anterior, en Buenos Aires, en el mencionado cantón de Viamonte y Talcahuano, bajo el mando del Capitán Manuel Roldán, muerto en la metralla; y probablemente habrían tenido el privilegio de escuchar las arengas de Leandro Alem.

Por el contrario, entre el cuerpo de oficiales jefes, el Capitán Abogado se destacaba por haber participado activamente en la represión de los sublevados en el Parque de Artillería (1890), al extremo que el entonces Teniente Félix Adalid le escribe el 29 de julio de 1890 al Jefe de los Cantones oficialistas del cruce de Cerrito y Tucumán, Coronel Juan G. Díaz, recomendando al entonces Teniente del Batallón de Ingenieros José M. Abogado y al Cap. Juan F. Genoud, porque "...han coadyuvado eficazmente al buen éxito obtenido".<sup>7780</sup> Su descollante actuación represiva le valió el ascenso a Capitán.<sup>7781</sup> Pero la salud no era su fuerte, pues para 1994 se le manifestó la sífilis.<sup>7782</sup> También el Alférez José M. Muñoz, integrante del Consejo de Guerra verbal, al pedir clemencia en 1897 por un castigo que venía padeciendo, recuerda que su persona había sido "...de los primeros en presentarse a la Plaza de la Libertad donde se hallaban las fuerzas leales mandadas por el Gral. Levalle".<sup>7783</sup>

### **S-I-B.- PESQUISA E INTERROGATORIOS POLICIALES**

Desentrañar la madeja de un supuesto comité revolucionario no era algo sencillo para un oficial del arma de artillería, sin experiencia en inteligencia militar, pues los códigos conspirativos más elementales dictaban que sus miembros no debían nunca mostrarse juntos, y que tampoco debían todos conocerse entre sí.

Con el fin de averiguar lo que había de cierto en la delatoria denuncia producida el 24 de septiembre por un soldado llamado Roque Roldán, el Tte. Cnel. Federico López citó al soldado Julián Bargas para formularle una serie de preguntas, pero dieron resultados infructuosos.<sup>7784</sup> Como López se apercibió que el citado Bargas "...lo había visto conversando en la puerta de calle con el soldado Roldán", concibió una original estratagema ordenando que el referido Roldán "...pasara preso a la Guardia y que en el **Libro de Presos** se le pusiera la nota de 'por delator'".<sup>7785</sup> Esta estratagema la adoptó "...a fin de que el soldado Bargas creyera que [él] no había hecho caso de la denuncia pudiendo así seguirles la pista y tomar infraganti delito a los presuntos sediciosos".<sup>7786</sup> Desde el mismo día que López tuvo noticias de este conato de sublevación se puso en

campaña "...a fin de constatar de una manera positiva quienes eran los autores y cuales sus cómplices, tomando al mismo tiempo toda clase de medidas y con todo sigilo afín de reprimir el movimiento sedicioso si repentinamente estallaba".<sup>7787</sup>

Cuatro días después, a la media noche del 28 de septiembre, en el mayor de los sigilos y sin el concurso del cuerpo de jóvenes oficiales subalternos (del cual su Jefe desconfiaba por haberlos conocido en su breve transcurso como profesor del Colegio Militar en 1886), el Tte. Cnel. López se presentó a recorrer el cuartel, y al entrar en él "...recibió parte del Sargento Primero distinguido Arditto Machiavello (egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos), que desempeñaba las funciones de Oficial de Guardia (por hallarse preso todos los oficiales del cuerpo)".<sup>7788</sup> Momentos antes, el soldado Francisco Toranzo, que se había reincorporado al Regimiento a su propio pedido (luego de haber estado el mes anterior en Buenos Aires de asistente del Jefe del Regimiento Ruiz Moreno), había invitado al Sargento Carabajal, que se hallaba de servicio en la Guardia de Prevención, a sublevarla "...manifestándole al mismo tiempo que había muchos soldados comprometidos".<sup>7789</sup>

De resultas de ello, el Sargento Machiavello detuvo al referido Toranzo y lo puso en el calabozo incomunicado. Más luego, al obligarlo a comparecer ante el Tte. Cnel. López e interrogarlo --vaya a saber con qué métodos-- confesó "...su plan de sublevar el Regimiento esa noche dándole al mismo tiempo los nombres de los cabecillas, que lo eran el ex cabo Felipe Miranda, el soldado Ramón Plaza y José Collanti siendo el más comprometido el soldado Julián Bargas".<sup>7790</sup> Es preciso tener en consideración que estos soldados no eran conscriptos sino veteranos, enganchados o voluntarios, siendo muchos de ellos rescatados de las cárceles de provincia, de su condición de condenados o procesados por delitos comunes.<sup>7791</sup> Para Bloch (2003), los que aparentan más bravura suelen ser los que menos resisten la derrota, y Toranzo parecía honrar dicho adagio.<sup>7792</sup> Acto continuo López se fue a la segunda compañía a la que pertenecían los tres primeros cabecillas "...haciéndolos levantar de sus camas y sacándolos sólo fuera del cuartel les intimó revólver en mano le dijeran la verdad, a lo que no se rehusaron manifestando su complicidad en el conato de sedición y confesando que los autores principales eran los soldados Francisco Toranzo y Julián Bargas".<sup>7793</sup>

En vista de la confesión de Toranzo, López ordenó al Sargento Machiavello "...formara la Guardia y la condujera al paraje donde él se encontraba con los cuatro presuntos sediciosos (Plaza, Collanti, Moreira, Ledesma)".<sup>7794</sup> El documento no nos revela de que paraje se trata, pero debemos presumir se refiere a la sede de la segunda compañía. Ante la presencia de la Guardia, el Tte. Cnel. López "...se puso al frente de ella y al arengarla [con fuerte voz de mando] respondieron con un viva de adhesión".<sup>7795</sup> En seguida López procedió a efectuar una razzia o redada en la oscuridad nocturna arrestando a todos los complicados identificados, y a asegurar así "...la tranquilidad en el interior del cuartel colocando en cada cuadra dos [sargentos] distinguidos de centinelas con la orden expresa de defender su puesto a sangre y fuego".<sup>7796</sup>

### **S-I-c.- Consejo Verbal de Guerra.**

Asegurada así la quietud de la unidad militar, el Tte. Cnel. López requirió entonces la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición y Gobernador del Territorio Nacional de Formosa, General de Brigada Napoleón Uriburu, "...a fin de que tomara la intervención que para estos casos prescriben las ordenanzas [de Carlos III]".<sup>7797</sup> "Tomar

intervención” significaba que López derivaba hacia arriba la responsabilidad del trámite que se habría de seguir. Debe tenerse en cuenta que en ese tiempo regía en materia militar sólo la Ley de Ascensos (1882).<sup>7798</sup> Si bien aún no estaba en vigencia ni la Ley 3190 de 1894 (redactada por los Tenientes Coroneles Ricardo Day y Augusto Maligne), ni el Código Bustillo (antecedente inmediato del Código de Justicia Militar), y aún prevalecían las Ordenanzas de Carlos III, desde 1852 y siempre y cuando no estuviere en vigencia la Ley Marcial, regía en todo el territorio, incluidos los denominados Territorios Nacionales, las garantías especificadas en la Constitución Nacional.<sup>7799</sup>

A continuación Uriburu se presentó de improviso en el Cuartel. Este General fue cuando joven, según lo describe Paul Groussac, de “exterioridad fanfarronesca”, aunque había sido Guerrero del Paraguay, Expedicionario del Desierto, Jefe de la Frontera de Salta, y Revolucionario en Julio del 90. Por su participación en esta última conflagración cívico-militar, debido a su filiación Mitrista, fue dado de baja; y más luego amnistiado, reincorporado y destinado a Formosa a mediados de abril de 1891.<sup>7800</sup> Uriburu había encabezado sendas expediciones exploradoras en 1870 y 1872, y había residido en este asiento de frontera, en la primera mitad de la década del 70, como Secretario del Cap. Luis Fontana y luego como Gobernador. A renglón seguido, y recordando que para septiembre ya se había firmado el Acuerdo Roca-Mitre, Uriburu --que competía en la región chaqueña con el General Antonio Dónovan a quien le fue ordenado intervenir en Corrientes con motivo de la sublevación del Batallón provincial en Julio de 1891-- asumió “...una actitud verdaderamente enérgica”, y con la fe propia de un converso imprimió al trámite la condición de juicio sumarísimo y dispuso --de acuerdo con las leyes militares-- la “...celebración de un Consejo de Guerra verbal”.<sup>7801</sup>

Este particular Consejo de Guerra, a diferencia de los Consejos de Guerra ordinarios y permanentes, era un Consejo especial o de Comando y por tanto extraordinario y ad hoc, sin actas ni testimonios escritos, de una duración máxima de 24 o 48 horas, y se formaba luego de que existía una denuncia oficial o por órdenes de los jefes de las Fuerzas Armadas, para juzgar a los uniformados sindicados de haber cometido traición a la patria, conspiración, sedición o rebelión.

Dicho Consejo de Guerra se constituyó en la Mayoría del Regimiento con la presidencia del oficial jefe Tte. Cnel. Federico López (5-5-A), de 36 años de edad, y se sortearon como Vocales --para que entendieran y fallaran en la causa-- a los oficiales subalternos del cuerpo (que actuaron del lado leal en los sucesos de Julio de 1890), todos más de diez años menores que él: el porteño José M. Muñoz; el tucumano Elías Paz (12-31-A), de 24 años; el correntino Antonio Tassi (16-37-I), de 22 años; el entrerriano Neriz F. Redruello (16-51-A), de 23 años; y el cordobés Demetrio Márquez (16-43-I), de 26 años; y el más joven de todos ellos Alberto Perón (16-45-A), de 20 años, quién extrañamente fallece en 1896 en Villa Nueva (actual Villa María) cuando sólo contaba con 25 años de edad.<sup>7802</sup> Todos estos oficiales tuvieron a su cargo el juzgamiento de tres de los soldados incriminados, el núcleo duro del comité revolucionario, compuesto por los soldados Bargas, Toranzo y Moreira. Salvo Muñoz, todos los otros miembros del Consejo eran egresados del Colegio Militar. De estos últimos, el Teniente 1º. Paz pertenecía a la Promoción 12ª, que egresó en 1886, y por tanto conocía las andanzas del Teniente César Cerri, perteneciente a la 10ª Promoción, o la conducta del Teniente Juan Comas, perteneciente a la 16ª Promoción. A esta última Promoción pertenecía el resto de la oficialidad del Regimiento, la cual egresó en 1990.<sup>7803</sup>

## **S-II.- Liderazgo Sedicioso**

### **S-II-a.- Características Personales del Liderazgo Sedicioso**

Extrañamente el sumario declara que Bargas se encontraba detenido fuera del cuartel en lo que vendría a ser una suerte de cárcel secreta. Esto probablemente ocurrió para evitar que estuviere en contacto con los otros soldados detenidos, por estar los calabozos comunicados entre sí. Se dispuso así, que una comisión especial fuera en busca del imputado como cabecilla, soldado Julián Bargas, "...la que lo trajo cerca de las doce meridiano".<sup>7804</sup> Bargas seguramente contaba con una personalidad inusual para su escaso rango militar, y habría estado dotado de un notorio carisma con el cual haber podido liderar una conspiración en un lugar tan recóndito y en condiciones tan adversas.

Al ser interrogado por el Tte. Cnel. Federico López, acerca de quién lo convenció de sublevar el cuerpo, Bargas contestó en presencia del Sargento primero distinguido Don Alberto Cáceres, también egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, que lo "...había hecho inducido por el Capitán Abogado", pero que más tarde "...al llamársele para que declarase negó esta aseveración".<sup>7805</sup> Pero al cabo de seis días de capilla (una experiencia por cierto más dura y fatal que las trincheras del Parque o del Paraguay) -- en estricta incomunicación y aislamiento-- un lapso suficiente para que se le borrara cualesquier rastro de golpiza, el tres de Octubre a mediodía, el primer testigo López declara que "...al ir al banquillo para ser fusilado", Bargas "...pidió permiso para hablar".<sup>7806</sup> Al serle concedido este último ruego, y dirigiéndose desde el patíbulo al Regimiento que se hallaba formado en cuadro, probablemente con los ojos vendados y con grillos en muñecas y pies, Bargas ratificó en voz alta que "...el capitán José M. Abogado era quien lo había inducido a sublevar el cuerpo".<sup>7807</sup> El tercer testigo, el Sargento Distinguido Eleodoro Quiroga, otro egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, declaró que apenas lo pudo escuchar, pues lo hizo susurrando y "...con voz entrecortada".<sup>7808</sup>

### **S-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados**

La Junta revolucionaria local se hallaba liderado por quienes se desempeñaban como soldados asistentes (Toranzo y Bargas), tanto del Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno como del Jefe del Escuadrón Capitán Abogado. Se elegía como asistentes por lo general a aquellos soldados más afines y de mayor confianza.

La condición de asistente, amén de tener que hacer los mandados a la esposa del oficial, debía cebar mate, oficiar de cochero y lustrar las botas de su Jefe lo cual le brindaba al nominado el privilegio de no hacer guardia, y no tener que estar subordinado a los jefes de compañía. Esto les permitía en el espacio intermedio entre el domicilio del oficial, el detall del escuadrón, la cantina del regimiento y la guardia de prevención operar como bisagras con el resto de los soldados y suboficiales conspiradores. En las bailantas y prostíbulos los días de franco, los soldados asistentes llevaban como primicia lo que los oficiales comentaban de sus lecturas en los periódicos.<sup>7809</sup> En ese sentido, ningún episodio público acontecido en el país o fuera de él habría pasado desapercibido. Ni el golpe de estado en Brasil de noviembre de 1889 que derrocó al Emperador Don Pedro II, ni el aniversario de la Revolución del 26 de Julio en Buenos Aires, ni el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda en la Legación Argentina en Santiago de Chile ocurrido el 18 de septiembre de 1891, ni la sublevaciones policiales y militares

acontecidas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, y la muerte en este último lugar de sus jefes y oficiales, podían haber sido ajenas en las ruedas materas.

Pero cabe señalar, por lo que surge del postrer expediente, que el soldado Julián Bargas, cabecilla del comité revolucionario de soldados, no delató a ninguno de los otros soldados implicados en la conspiración, ni al Sargento Carabajal ni al ex Cabo Miranda implicados en el complot, ni tampoco al Alférez Muñoz, quien tenía en común con Bargas el haber sido al inicio de su carrera soldado distinguido, sino a un capitán del cual había sido asistente, que provenía del Colegio Militar, había actuado con las fuerzas represoras en la Revolución del Parque y que al momento del descubrimiento del conato sedicioso se hallaba ausente en Buenos Aires, el Cap. José M. Abogadro.<sup>7810</sup> Como en el interrogatorio el soldado Bargas calló, se ignora si existieron otros soldados conjurados que se hubieren librado de las delaciones de los soldados traidores, quebrados por los tormentos, Roldán, Toranzo y Moreira.

Seguramente, Bargas supo en esos desolados días que el proceso verbal (lectura del sumario, plenario, acusación y defensa) no deja testimonio escrito, y por eso apeló a una denuncia equívoca o falsa para lograr que en última instancia se abriera un sumario post-mortem. También habría pensado que denunciando en público sólo a un oficial, al existir entre ellos una atmósfera de sospecha se dividirían y se verían obligados a substanciar un sumario escrito, y que por tener que intervenir un fiscal y estar obligados a indagar testigos podría ganar tiempo y postergar sine die lo inevitable. En cuanto a la verosimilitud de la denuncia producida en artículo de muerte, el Tte. Cnel. López "...no la creyó cierta por tener la mejor opinión formada del referido Capitán y considerándole materialmente incapaz de entrar en consorcio con la tropa para llevar a cabo un acto sedicioso".<sup>7811</sup>

### **S-III.- Confesión *in Artículo Mortis***

De lo que surge de las actuaciones administrativas, el soldado Bargas había declarado ante la Asamblea de Jefes, oficiales y sargentos distinguidos y del Consejo de Guerra verbal, que se celebró en el Cuartel del Regimiento en la madrugada del día 29 de septiembre para oír y juzgar primero al soldado Francisco Toranzo, que "...no sabía nada de la sublevación".<sup>7812</sup> Pero cinco días antes, el 24 de septiembre, ya le había revelado al segundo jefe del cuerpo Federico López "...que había sido inducido a sublevarlo por el Capitán Abogadro".<sup>7813</sup> ¿Que paso en estos cinco días para que el soldado Bargas revirtiera sus declaraciones previas?

Sin embargo, la declaración hecha el 3 de octubre, momentos antes de ser ejecutado, la había oído el segundo testigo sargento distinguido Alberto Cáceres y es la misma declaración que hicieron ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, tanto el Tte. Cnel López como el Teniente Elías Paz, confesión que había repetido *in articulo mortis* "...delante de todo el Regimiento formado y que debe haber sido oída por todos los Señores oficiales, clases y soldados del mismo".<sup>7814</sup> También el cuarto testigo Alférez de la Primera Batería del Primer Escuadrón Neriz F. Redruello declaró ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre que lo confesado por el soldado Bargas, en artículo de muerte, fue mas o menos lo siguiente: "...que estándole sevando mate en el cuarto de Banderas, a dicho Capitán [Abogadro], éste lo había visto para que invitara a los soldados de su compañía para el movimiento sedicioso que debió estallar en la noche del 28 del mes ppdo.".<sup>7815</sup> De cuanto le había manifestado, Abogadro le pidió "...guardara silencio hacia el

General y Comandante, y que el declarante ignora haya manifestado lo contrario delante de nadie”.<sup>7816</sup> El Gral. Uriburu concluía rápidamente, conocedor como pocos del arte de conspirar (se había sublevado en Salta contra el Gobernador Francisco J. Ortiz y en la Revolución del Parque contra el Presidente Juárez Celman), que lo que muy probablemente “había de verdad en estas acusaciones”, es que una vez sorprendido en su conspiración, el soldado Bargas, preso del temor por lo que podría sobrevenir, había querido “...descargar una parte de su responsabilidad acusando a un superior”.<sup>7817</sup>

A pesar de estar suspendido, el Consejo de Guerra verbal que debía juzgar al tercer soldado José Moreira --desertor y complicado en el delito de sedición-- se había resuelto por unanimidad el 29 de septiembre llamar a su seno al Jefe de las fuerzas de la Guarnición con el objeto de oír su opinión, para lo cual se le había extendido la nota de estilo. Pocos momentos después del llamado, el General Napoleón Uriburu acudió al salón de la Mayoría, y luego de oír al Tte. Cnel. López y al Teniente 1º Paz “...resolvió que lo actuado por el Consejo le fuese elevado para su resolución suspendiendo así el Consejo”.<sup>7818</sup>

El proceso fue interrumpido adrede por razones que no quedan claras. Como se verá más luego en el juicio de instrucción substanciado con motivo de la acusación *in articulo mortis* que pesaba sobre el Capitán Abogadro, se daba en el cuartel --según lo expresado por el Teniente Tassi y el Tte Cnel. López-- una extrema familiaridad entre oficialidad y tropa, así como “...habrían criticado con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa”.<sup>7819</sup> Entre cuáles oficiales y cuáles soldados se daba dicha familiaridad y de que tipo de familiaridad y crítica violenta se trataba no es posible determinarlo. Sin embargo, se debe presumir que dicha acusación se refería esencialmente a las relaciones entre la oficialidad y una tropa enganchada y veterana, muy diferente a la tropa conscripta que se dio posteriormente; y específicamente se refería a la relación entre oficial y soldado asistente. Pero puede suponerse también, como lo sostuvo Bloch (2003), que cuando la superposición de autoridades es excesiva la responsabilidad se diluye.<sup>7820</sup> Dentro de ese tipo de relaciones podrían entrar tanto el Capitán Abogadro y su asistente Bargas, como el Coronel Ruiz Moreno y su asistente Toranzo.

Sin embargo, los tenientes, que debían ser jefes de compañía o batería, no tenían el privilegio de designar soldados asistentes. El Teniente Tassi era el menos sospechoso de todos ellos por haber sido el más crítico al extremo de ser luego cambiado de destino, conjuntamente con su compadre el Teniente Márquez. Redruello también había sido muy crítico pues manifestó creer que “...la causa que haya motivado el conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía”.<sup>7821</sup> En conclusión, por descarte, sólo queda pensar en el trío de los oficiales subalternos Muñoz, Paz y Perón, quienes permanecieron en el regimiento y aparentemente se hallaban enfrentados con el dúo formado por los tenientes Tassi y Márquez.

Lo cierto es que para reforzar el espíritu de cuerpo, evitar seguir hurgando en el conflicto y que se abriera una Caja de Pandora que le quemara las manos, pudiera comprometer el prestigio de la Guarnición y generar entonces un clima de deliberación, una corriente de simpatía hacia el procesado y una eventual rebelión de la tropa, semejantes a las ocurridas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes apenas unos meses atrás; el tres de Octubre, por decisión del Jefe de la guarnición General Uriburu, y sin más trámite procesal, se ejecutó al soldado Bargas con todo el

ceremonial militar del caso. Se ignora si en dicho ajusticiamiento existió el derecho a ser asistido por un capellán castrense que le prestara los últimos auxilios (extremaunción), y si quedó registrada su acta de defunción en los libros de alguna parroquia o cementerio. También se ignora si Uriburu comunicó su sentencia al Ministro de Guerra Levalle, y éste al Presidente Pellegrini, para que --como en el célebre caso del Cabo Paz acontecido en 1935 (Carreras, 1974)-- pudiera existir la oportunidad de un indulto.<sup>7822</sup>

Más luego, en el mismo día, el Tte. Cnel. Federico López presidió otro Consejo de Guerra verbal esta vez contra el soldado José Moreira "...que por declaraciones aparecía como uno de los cabecillas del conato de sublevación y que había desertado en la madrugada del día 29 de septiembre".<sup>7823</sup> Pero como al prestar su deposición el primer testigo soldado Lucio Ledesma apareciese con mayor grado de culpabilidad que el presunto reo José Moreira, el Tte. Cnel. López hizo presente esta situación a los Vocales del Consejo de Guerra que "...en vista de esta circunstancia se hacía necesario la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición a fin de que resolviese la dificultad del caso".<sup>7824</sup>

## **S-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra**

### **S-IV-a.- Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública**

El conato de sedición y el fusilamiento, cuya posible repercusión en Buenos Aires tanto lo tuvo preocupado al Comandante Federico López, según nos lo informa el Cap. Abogado, no alcanzó a trascender a la opinión pública del país.<sup>7825</sup> Ninguno de los grandes diarios de la época levantó la noticia, lo cual era concebible en el diario ***La Nación*** (propiedad del ex presidente Mitre), porqué en Junio de 1991 acababa de firmarse el Acuerdo Roca-Mitre, y ya no regía el estado de sitio.<sup>7826</sup> Pero por tratarse del drama de un simple soldado --en medio de una república aristocrática pero acusada de oligárquica-- tampoco ninguno de los otros diarios habría demostrado interés por levantar la noticia.<sup>7827</sup> Por cierto, muy otra hubiera sido la recepción del hecho de haberse tratado de un oficial, como fue al año siguiente el sonado caso de los oficiales de la Corbeta Rosales, hundida en el Río de la Plata con toda la marinería a bordo, y comandada por el Capitán Pedro Funes, sobrino político del ex Presidente Julio A. Roca.<sup>7828</sup>

Sin embargo, a pesar de tratarse de un mero soldado, es inconcebible que el Jefe de la Guarnición de Formosa Gral. Napoleón Uriburu no haya comunicado semejante novedad por vía telegráfica al Ministro de Guerra Gral. Levalle, ni que éste no se la haya elevado al Presidente de la República Dr. Carlos Pellegrini y no haya ordenado publicarla en el Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército. Si ese último fue el caso, y la cruel novedad fue eventualmente publicada en dicho Boletín --que si bien hoy los ejemplares de ese año son inhallables no pierdo la esperanza de encontrarlos-- no se comprende como la información no llegó a la redacción de los periódicos y por consiguiente a ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Por lo tanto, debemos concluir que el inclemente episodio no alcanzó a publicarse en dicho Boletín Oficial --o lo fue pero en un Boletín Reservado-- por cuanto no lo registran ni la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, ni los Asuntos Entrados y los Pedidos de Informes de ambas Cámaras del Congreso, ni el Senador Alem lo

denunció en su discurso posterior al trágico hecho, ocurrido el 20 de octubre de 1891.<sup>7829</sup> Es decir, podemos deducir que la no publicación en el Boletín Oficial del Estado Mayor de un hecho de semejante tenor debe haber obedecido a un acto de autocensura del propio Ministro de Guerra y Marina General Levalle, a los efectos de encubrir el acto de Uriburu, a quien por razones obvias no podía avalar públicamente ni tampoco destituir.

El impune escamoteo de dicha información al público y las instituciones permitiría conjeturar que esta pena capital en juicio sumarísimo, que debería caracterizarse como ejecución sumaria o extrajudicial, no fue la única dictada en ese trágico tiempo.<sup>7830</sup> Y la autocensura acordada por el Ministro de Guerra con el Presidente Carlos Pellegrini y el Ministro del Interior General Julio A. Roca habría obedecido a la decisiva influencia que estos últimos ejercían sobre el primero, seguramente por ser en el caso de Pellegrini hijo de “gringos”, es decir paisano de origen (Italia).<sup>7831</sup> La naturaleza lavada de dichos Boletines, que no informan sobre ningún tipo de castigos, permite a su vez conjeturar que estaban dirigidos a desinformar a la opinión pública. Cabe entonces argumentar que el cruento hecho político fue sepultado en un olvido premeditado, quedando mutilado ex profeso de la memoria colectiva por obra de las más altas esferas del gobierno nacional.

Sin embargo, a pesar de la autocensura oficial se hace difícil pensar que la noticia no haya podido filtrarse al menos entre los colonos de las chacras, los capataces y peones de los obrajes madereros del Chaco, y las meretrices y madamas de los prostíbulos, dado que la ejecución fue practicada frente al “Regimiento formado en cuadro”, lo cual significa casi un millar de testigos cuya identidad debe haber quedado registrada en las Listas de Revista de la época. Y pese a lo fracturado que estaba el Ejército y lo arrinconados que estaban los oficiales revolucionarios ¿no estaban dichos oficiales enterados de la existencia de juicios sumarísimos? Y si lo estaban ¿porque no atinaron a transmitirla a la conducción partidaria para que Alem la denunciara en su discurso senatorial del 20 de octubre de 1891? ¿Acaso, la condición de soldado, que detentó la víctima, le restaba relevancia política al episodio?

La pena de muerte y los tormentos eran entonces un ingrediente asiduo para repeler las deserciones o la cobardía y la traición en el campo de batalla pero no para reprimir fríamente eventuales e hipotéticos motines o sediciones de naturaleza política. En la guerra al Indígena en el Desierto, el Comandante Manuel Prado, el Coronel José S. Daza y *La Vanguardia* nos revelan conmovedores fusilamientos por casos de deserción y el General Ignacio H. Fotheringham nos confiesa la existencia en los cuarteles de crueles tormentos.<sup>7832</sup> Cuando la Revolución del 90, también se propaló la existencia de fusilamientos en el campo de batalla, pero que en el caso del Cap. Eloy Brignardello, no se lograron corroborar.<sup>7833</sup> Pero, salvado este último caso, lo que hace de lo ocurrido en el Chaco Central (Formosa) extremadamente singular, es que hacía tiempo que no se aplicaba la pena capital por causas de orden político y fuera del campo de batalla. Probablemente, la impunidad de este caso se haya difundido entre los cuadros de oficiales, pues treinta años después, en 1921, el Coronel Héctor Varela repitió en ocasión de las huelgas rurales acontecidas en los Territorios Nacionales de la Patagonia procedimientos sumarísimos semejantes, lo cual fue holgadamente investigado y divulgado por José María Borrero y Osvaldo Bayer y hasta cinematográficamente representados.

#### **S-IV-b.- Derivaciones Psicológicas**

Lo cierto es también, que salvo el Capitán José M. Abogado, cuyo legajo personal no fue ni expurgado ni desglosado, lo cual hablaría bien de él, los otros miembros del Consejo de Guerra verbal fueron víctimas del síndrome del verdugo, pues a pesar de haberse contradicho y enfrentado mutuamente, como luego se observará, ocultaron sistemáticamente los hechos y guardaron un silencio mortal. Del ex cabo y de los soldados que lo denunciaron al soldado Bargas nada he podido averiguar hasta el momento. Y del propio Bargas, se desconoce su lugar de origen, quienes fueron sus padres, si tenía hermanos y/o prometida, si tenía estudios, y si ingresó al ejército como soldado raso, de leva enganchada o voluntaria, y en este último caso si era o no soldado distinguido.

En ese entonces, por regir aún las Ordenanzas de Carlos III, se daba el título de "don" a todos los oficiales y sargentos, y a los hijos de soldados, se les calificaba aptos para recibir el título de "distinguido" y para postular a la plaza de "Cadete".<sup>7834</sup> Para sentar plaza como "soldado distinguido", la cual era una institución propia del antiguo régimen colonial habsburgo y de su estructura estamental, era necesario entonces haber nacido en una familia "decente y conocida". Pero por su apellido y la indiferencia con que fue recepcionada su victimización podemos presumir que su familia no pertenecía al estamento "decente", y que por el contrario era un criollo, probablemente del interior, y como tal no era blanco ni rubio, sino trigueño, mestizo o mulato. Demás está decir que se ignora donde fue enterrado y cual fue su tumba, y que ninguna calle o plaza del país recuerda su nombre.

Las secuelas que produce el terrorismo de estado difieren según la edad, el lugar de origen, la adscripción política-religiosa, la extracción social, y la posición económica. Entre los miembros de las fuerzas armadas, estas secuelas deben variar acorde con la jerarquía militar y la responsabilidad alcanzada. Entre las expresiones del sufrimiento provocado por el trauma psicológico se dan el susto, la tristeza, la depresión, el duelo alterado, el mutismo, la desconfianza, la inhibición e indefensión, y las enfermedades somáticas y psicosomáticas (insomnio, palpitaciones, asma, hipertensión arterial, cefaleas, torticollis, náuseas, dolores de cabeza y de estómago, etc.). También se dan otras expresiones del sufrimiento como las pesadillas, la apatía, el alcoholismo, el suicidio, y los sentimientos de cólera y soledad.<sup>7835</sup>

## **S-V.- Omisión de debido Proceso.**

### **S-V-a.- Ausencia del Derecho de Defensa**

De las constancias escritas que se han podido rescatar, no se desprende que en el juicio sumarísimo del soldado Julián Bargas se haya cumplido con el debido proceso, pues aparentemente no hubo etapa de instrucción ni fue confrontado o careado con los soldados acusados que lo delataron (Roldán, Toranzo), ni con el Cap. Abogado imputado de instigador, en ese momento ausente en Buenos Aires.<sup>7836</sup> Tampoco se puede saber si tuvo acceso a un oficial auditor que hiciera de defensor, designado de oficio, que interpusiera un Habeas Corpus; y si en efecto se le dio la oportunidad de la defensa, como la tuvieron los criminales de la Mazorca (Cuitiño, Badía, Alem [padre], Troncoso, Parra, Santa Coloma) en tiempos del Estado de Buenos Aires (1857), defendidos por el célebre letrado y político Marcelino Ugarte; o como los oficiales de la

hundida Corbeta Rosales (1892), defendidos por Enrique Victorica, hijo del Ministro de Guerra Benjamín Victorica.

Por no ser entonces provincias, en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa, La Pampa y Misiones y en los cinco Territorios de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén) --como en la Colonia Penitenciaria que describe Kafka, o la más moderna Base de Guantánamo (USA)-- no existían poderes judiciales independientes ni división de poder alguna, ni legislaturas o guardias provinciales que equilibraran el poder militar del Ejército, ni existían periodistas como José María Borrero (Santa Cruz en 1919) que pudieran formular observaciones críticas que comprometieran los actos de sus todopoderosos Comandantes de Guarnición.

Por otro lado, en esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar (1894) ni el Código Bustillo (1898), los juzgados militares se regían por el Compendio de Colón de Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta (1858).<sup>7837</sup> Pero si bien los miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la Constitución Nacional también estaban protegidos por un fuero especial. Ese fuero especial era el que emana del decreto real del 9 de febrero de 1793, que establecía el Fuero Militar o fuero de guerra en los ejércitos de España y ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales castrenses de los militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, es decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.<sup>7838</sup>

### **S-V-b.- Justicia Penal Militar.**

Las actuaciones administrativas de rigor en la Justicia de Instrucción Militar se iniciaron cuatro días después de la ejecución del soldado Bargas, el 7 de octubre, al elevar el 2º Jefe del Regimiento Federico López al Jefe Coronel Ruiz Moreno un Parte de la situación donde le informaba de la denuncia producida *in articulo mortis* por el ajusticiado Bargas contra el Cap. José M. Abogadro.

Dado que el referido oficial Abogadro "...no ha dado paso alguno para vindicar su inocencia", López creía de su deber llevar la cuestión a su Jefe para que "...dicte las providencias convenientes".<sup>7839</sup> El mismo día, el Jefe del Regimiento Ruiz Moreno elevó el Parte correspondiente con copia a su vez del Parte del Tte. Cnel. López al Jefe de la Guarnición Gral. Uriburu. Y una semana más tarde, el Gral. Uriburu nombró como Fiscal para la averiguación de los cargos efectuados contra el Cap. Abogadro al Jefe del Detall Fiscal Mayor Carlos Carpi, encargado de la instrucción del sumario, y Carpi nombró como su Secretario al Jefe de la Primera Batería del Cuarto Escuadrón del mismo Regimiento, Alférez José Miguel Mujica.

Ante Carpi y Mujica declararon el acusado Cap. Abogadro, el Jefe de la Guarnición Uriburu y cinco testigos: el 2º Jefe Tte. Cnel. López, los Sargentos 1º Distinguidos Alberto Cáceres y Eleodoro Quiroga, el Alférez Neriz F. Redruello y el Teniente 1º Elías Paz. Extrañamente, ni Antonio Tassi, ni Demetrio Márquez ni José M. Muñoz, que integraron el Consejo de Guerra verbal, fueron citados como testigos. El primer testigo en declarar fue el Tte. Cnel. López, quien se ratificó del Parte que en su oportunidad elevara. A renglón seguido se produjo la indagatoria del acusado y arrestado Cap. José M. Abogadro, de 23 años de edad, quien negó todos los cargos por ser "completamente falsos" y manifestó que la acusación del soldado Bargas "...no heras mas que una impostura por salvarse del castigo".<sup>7840</sup>

## S-VI.- Causales de la Asonada

### S-VI-a.- Causales Políticas

A fin de inquirir la verdad de los móviles que pudieron haber impulsado a los soldados a cometer el acto sedicioso del 28 de septiembre, y dado que el Teniente 1º Elías Paz había manifestado no recordar por haber estado en aquella ocasión con una cefalea (“malo de la cabeza”), y estando presentes en el Consejo de Guerra Verbal el Tte. Cnel. Federico López como presidente del cónclave, y a su derecha sentados en cónclave los vocales que en él actuaban, por estricto orden de antigüedad, previa la venia del Gral. Uriburu, López pidió “...al Consejo (compuesto de los oficiales del cuerpo) que del seno de ellos nombrasen uno que haciéndose intérprete de la opinión de todos manifestase lisa y llanamente las causas que en conciencia creyeran habían dado margen al conato de sedición”.<sup>7841</sup>

No encontrándose para ello inconveniente alguno --y por votación nominal-- se nombró al Teniente 2o Antonio Tassi (tenía una jerarquía menor a la de Paz, pero poseía el orden de mérito más alto), seguramente por ser el más locuaz y el que se encontraba en esa tenebrosa ocasión más entero, quien en su nombre y en el de los oficiales compañeros manifestó “...que juzgaba que la sublevación era debida a que el cuerpo está formado de **soldados revolucionarios**; que en Buenos Aires daban vivas a la **Unión Cívica** dentro del Cuartel”.<sup>7842</sup>

Preguntado el Tte. Cnel. López si creía que “...sean estas las causas que han dado margen al conato de sedición que debió estallar el 28 del mes ppdo. en el Regimiento de su accidental mando dijo que la manifestación del Teniente Tassi en representación de sus compañeros lo convence, pero que se va a permitir agregar una confidencia que le hizo el Cap. José M. Abogado”.<sup>7843</sup> En efecto, el 30 de septiembre López le preguntó al Cap. Abogado, quien recientemente había regresado de Buenos Aires, si conocía las causas que podían haber dado margen al conato de sedición a lo que el Capitán contestó con la siguiente significativa afirmación: “...Sr. esto no me ha tomado de sorpresa pues este cuerpo ha estado por sublevarse en Buenos Aires y en Resistencia [Chaco Austral]”.<sup>7844</sup> A renglón seguido, Abogado declaró que “...fundaba su creencia por lo que había leído en los periódicos las dos veces que cita [Buenos Aires y Resistencia]”, y que lo dice para “...tranquilizar el ánimo del Comandante [López] quien muy afligido lo había interrogado que se diría de lo acontecido en Buenos Aires”.<sup>7845</sup> Pero Abogado, sospechando lo inevitable, añadía a su vez en aras de salvar la vida de quien fuera su asistente y ahora su acusador, que “...jamás el cuerpo había intentado sublevarse y que no tiene conocimiento se haya levantado”.<sup>7846</sup> Y el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello también había manifestado que creía que “...la causa que haya motivado el conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía, por haber pertenecido muchos de los soldados que forman parte del Regimiento a la última revolución”.<sup>7847</sup> Lo extraño del caso es que ninguno de los oficiales consultados haya sugerido la posible influencia de lo acontecido en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes unos meses atrás.<sup>7848</sup>

Pero si esto fue verdad y se insiste en averiguar las causas, es decir en creer que el conato sedicioso no fue un capricho individual de Bargas ni obedeció a razones o causas propias de la población fronteriza y obrajera de Formosa; y se concuerda además que

Abogado no fue el instigador militar, tal como López y Uriburu convinieron, ¿porqué extraña razón no se indagó acerca de los responsables civiles de la conspiración? Es decir, ¿porqué no se buscó si existió o no el compromiso de algún político Liberal o Radical de Resistencia, de Corrientes o de Buenos Aires que hubiere tenido contactos con el soldado Bargas?

#### **S-VI-b.- Indisciplina Castrense como Causal.**

La lenidad disciplinaria tendría su origen en la academia militar francesa, de raíz napoleónica, fuente inspiradora hasta ese entonces de las academias chilena y argentina, aún no impregnadas por la doctrina Prusiana, que como más luego veremos recién comienza su penetración a comienzos de la década del 90.<sup>7849</sup>

En nuestro caso paradigmático, incorporado en las actuaciones de la justicia de instrucción militar, el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello había declarado el 16 de octubre que creía también recordar como causal del conato de sedición la lenidad o indulgencia de los oficiales para con la milicia, pues "...muchas veces al ser castigada la tropa por oficiales eran estos puestos inmediatamente en libertad por los jefes"<sup>7850</sup> A que Jefe se refiere no queda claro. Pero es posible suponer que se refiere al Jefe del Regimiento Coronel Julio Ruiz Moreno, cuyo asistente era el soldado Francisco Toranzo. Y para abonar su interpretación puramente política del evento frustrado, el acusado Cap. Abogado negó que la causal del conato sedicioso se hubiera originado en la injusta distribución del rancho, pues esa acusación la atribuía a una "...maldad de los que la encabezaban por cuanto en esa época la administración de los fondos y el racionamiento se hacía con toda equidad".<sup>7851</sup>

Asimismo, el Teniente 2º Antonio Tassi había declarado, en un fuerte e inusual tono autocrítico, que los oficiales del cuerpo (que en esos días estaban arrestados y sumariados y que se puede presumir se refería a los alféreces Muñóz, Paz, Perón y Redruello) habían "...contribuido en mucho sin darse cuenta a fomentar la sedición".<sup>7852</sup> Según Tassi, esto ocurría debido a "...sus **murmuraciones** imprudentes en presencia de la tropa y que recién se daba cuenta de la gravedad de la falta que habían cometido y la justicia con que habían sido castigados por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del Jefe accidental del Regimiento [Federico López]".<sup>7853</sup> Estas sugestivas como reveladoras declaraciones del Teniente 2º Tassi, formuladas ante el Consejo de Guerra verbal, pese a la gravedad de las imputaciones inferidas de no guardar la debida distancia simbólica con los subalternos soldados, no fue desaprobada por ninguno de los oficiales, lo que equivale decir que le prestaron voluntaria o involuntariamente su asentimiento, cuando aún no se sabía el desenlace que iba a tener el trágico acontecimiento. Encontrábanse presentes en el evento el Jefe de las fuerzas de la guarnición, el declarante Tte. Cnel. Díaz, el capitán Jose M. Abogado, los oficiales subalternos Tenientes Elías Paz y Antonio Tassi; y Alféreces Demetrio Márquez, José M. Muñóz, Neriz F. Redruello y Alberto Perón.

En cuanto a lo manifestado específicamente por el Teniente 2º Tassi en nombre del Teniente 1º Elías Paz,<sup>7854</sup> acerca de lo que creía "...pudiera haber influido en el espíritu de la tropa al conato de sedición algunas conversaciones entre oficiales en caso que estos la hubieran tenido y que oída por los asistentes [Bargas y Toranzo] hubiera repercutido en la tropa", el quinto testigo Teniente Paz aseguró --ya libre de la jaqueca o cefalea que lo había atormentado durante las deliberaciones del Consejo de Guerra-- al

declarar ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre, “...no haber oído conversación imprudente jamás”.<sup>7855</sup> Si no se opuso cuando dicho Teniente 2º Tassi habló de esa manera, lo fue “...porque como se lo había manifestado al señor Presidente del Consejo anteriormente no se encontraba en condiciones...de darle cuenta absolutamente de nada por lo que deja expuesto más arriba [estar malo de la cabeza]”.<sup>7856</sup>

En tanto, el propio Teniente 2º Tassi también declaró el 16 de octubre comprender recién la gravedad de la falta que habían cometido y de “...la justicia del castigo recibido por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del jefe accidental del cuerpo [López]”.<sup>7857</sup> Si hubiesen tenido conocimiento y conciencia exacta de lo que pasaba, Tassi creía que “...no habrían criticado con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa; pero que conociendo ya la gravedad de la situación estaban resueltos a hacerse **quebrar los huesos** y quebrárselos a los que intentasen sublevarse”.<sup>7858</sup> Estas afirmaciones del Teniente 2º Tassi, que aludían a una supuesta crítica de la conducta de un superior (de quien no se aclara la identidad pero que debemos presumir se refiere al General Uriburu por su apoyo al Acuerdo Roca-Mitre), y a una aparente promiscuidad o amiguismo entre oficiales y soldados asistentes entabladas en ocasión de cebar mate (el Coronel Ruiz Moreno y su soldado asistente Toranzo; y/o el Capitán Abogadro y su soldado asistente Bargas), y denunciadas en oportunidad del Consejo de Guerra verbal “...fueron escuchadas por todos y ninguno de los oficiales a cuyo nombre habló hizo observación ninguna que manifestase disconformidad”.<sup>7859</sup>

Pero en cuanto a la grave acusación que ventiló en el Consejo de Guerra el Tte. Cnel. López, que todos los oficiales “...acostumbraban criticar fuertemente los actos de sus superiores”, actitud que en el ámbito militar se la califica como **murmuración** y es casi tan grave como el delito de sedición que se le imputó al soldado Bargas, Uriburu concluía por no dar crédito a las acusaciones ventiladas tanto por el Tte. Cnel. López como por el Teniente 2º Tassi, y terminaron por exculpar y sobreseer a dichos oficiales, pues argüía que “...no prueban nada especial y particularmente contra el Capitán Abogadro”.<sup>7860</sup>

Al día siguiente, 17 de octubre, el Fiscal Carpi, no resultando cargo alguno contra el Cap. Abogadro y en vista de lo declarado por el 2º Jefe del Regimiento Federico López, pide al Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno que “...se sirva dictar las órdenes del caso para que el referido Capitán sea puesto en completa libertad”.<sup>7861</sup> Y un mes después, en noviembre, llegó la orden del Ministerio de Guerra, para que los Tenientes Tassi y Márquez se trasladen a Catamarca.<sup>7862</sup>

#### **S-VI-c.- Venganza como Causal**

En cuanto a otros motivos por los cuales el soldado Bargas se propuso sublevarse, el segundo testigo Sargento Distinguido Alberto Cáceres declaró que “...supone haya sido por alguna venganza o rencor”, y el tercer testigo Sargento Distinguido Eleodoro Quiroga declaró que a Julián Bargas se le “...han leído las leyes penales, pasado revista de comisario, hecho el servicio de su clase, y prestado el juramento de fidelidad a la bandera”, y que “...la conducta que observaba en ella hera regular y que los castigos que se le han aplicado han sido plantones y calabozo por diferentes causas, habiendo

sido el último un plantón impuesto por el Cap. José M. Abogado, Comandante de la Batería, y que esto fue a consecuencia de un cargo que el referido soldado se negó a pagar”.<sup>7863</sup> Asimismo, Quiroga declaró que el referido soldado “...padecía del **defecto de la murmuración** por cuya causa ha recibido varios castigos”.<sup>7864</sup>

## **S-VII.- Ejecución sumaria como Escarmiento**

El Fiscal Mayor Carpi tomó declaración el 20 de octubre al Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu, tocándole a éste informar que “...el soldado Julián Bargas del precitado Regimiento de Artillería que se halla de guarnición en este punto, fue fusilado como a las once y media de la mañana del día tres del actual, por haberse plenamente comprobado por medio de las averiguaciones practicadas, que trató de sublevar el cuerpo y porque la gravedad de las circunstancias imponían esa medida por mas que fuese dolorosa”.<sup>7865</sup>

A que “gravedad de las circunstancias”, aludía Uriburu en ese entonces. Por cierto no se refería a ninguna circunstancia local de la frontera Chaqueña, sino a las circunstancias nacionales que se vivían en los cuarteles de toda la república a partir de que se desencadenara la revolución de julio de 1890, y seguramente a partir de la sublevación de julio de 1891 en Corrientes.<sup>7866</sup> Sin un “castigo inmediato y ejemplar”, es decir un escarmiento, en ese momento mismo, pero en cabeza de un chivo emisario o expiatorio, que tuviera un efecto disuasorio sobre todos los cuadros del ejército, como se estilaba en el Antiguo Régimen colonial español y en la era Rosista (cabezas clavadas en picas a la entrada de los pueblos o en la plaza mayor), Uriburu alegó que “...los males habrían sido cien veces mayores, pues la sublevación se habría producido el día menos pensado y ya se puede suponer lo que entonces habría sucedido”.<sup>7867</sup> Para la conservación y salvación del cuerpo y de estas apartadas poblaciones, argumentaba Uriburu, “...fue necesario proceder sin perder un instante en la forma y manera enérgica que se procedió”.<sup>7868</sup>

Sin embargo, salta a la vista la existencia de una llamativa contradicción en el seno del poder, cuando por un lado el Comandante Uriburu hacer caer una culpa colectiva sobre alguien en particular, aunque fuere el eslabón más débil de la cadena jerárquica, y lo ajusticia para escarmentar o disuadir, y por otro lado el Poder Ejecutivo, mediante su Ministro de Guerra, oculta el luctuoso suceso tanto a la opinión pública como al parlamento.

## **S-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones.**

Finalmente, un mes después, en Noviembre de 1891, y como consecuencia de la crisis que sus extremadamente francas pero explosivas y auto-inculpatorias declaraciones habían ocasionado en el seno del cuerpo de oficiales del Regimiento, tanto el Teniente Tassi como su allegado el Alférez Demetrio Márquez fueron trasladados a un Regimiento en Catamarca.<sup>7869</sup> Tassi llegó a estar complicado en la Conspiración de Santa Catalina en 1892, luego alcanzó el grado de Teniente Coronel, luego de haber sido premiado con igual grado por el ejército Peruano, y más tarde cuando Coronel, fue

designado Subdirector del Colegio Militar.<sup>7870</sup> Tres años después, en 1907, fue sumariado y procesado por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un superior, el General Saturnino E. García, falleciendo en 1938 a los setenta años de edad.<sup>7871</sup>

De los otros oficiales que sobrevivieron al soldado Julián Bargas, Uriburu ejerció la gobernación de Formosa hasta 1894 y falleció en Buenos Aires al año siguiente, en 1895. Ruiz Moreno, fue dado de baja a su solicitud y debido a su estado de salud en abril de 1893, pasó a retiro en 1900 como General de Brigada y falleció en San Luis en 1914.<sup>7872</sup> López desplegó luego sus andanzas en el monte chaqueño donde alcanzó el grado de Coronel, y se retiró en 1911, falleciendo el mismo año a los 56 años de edad.<sup>7873</sup> Abogado llegó a Coronel y se retiró en 1924, pero sugestivamente no llegó a General como sí fue el caso de su hermano menor Enrique. Elías Paz continuaba en el mismo Regimiento de Artillería en 1893 y llegó al grado de Mayor, falleciendo en 1905 a los 38 años.<sup>7874</sup> José M. Muñoz llegó a Teniente 2º en 1894, pero fue dado de baja por abandono de destacamento pasando seis meses de prisión en Santa Cruz.<sup>7875</sup> Neriz F. Redruello, llegó a Mayor y falleció en 1924 a los 56 años.<sup>7876</sup> Y Alberto Perón, llegó al grado de Teniente 1º, falleciendo en el servicio activo en 1996 a los 25 años, cuando su célebre sobrino tenía apenas un año de edad.<sup>7877</sup> Dada la prolijidad con que el legajo del Teniente Perón fue expurgado cabe presumir que existieron elementos comprometedores, que deben estar vinculados a su extraña muerte prematura.<sup>7878</sup> Por último, el Regimiento fue trasladado en 1892 a Villa Nueva (actual Villa María, Córdoba), y en su cuerpo de oficiales aún continuaba revistando el Teniente Perón.<sup>7879</sup>

De los primeros delatores soldados Francisco Toranzo y Roque Roldán, y de los otros soldados complicados Ramón Plaza, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, nada he podido saber hasta el presente, ni tampoco si entre los conjurados existió alguno que continuara consecuente con el ideario político que Bargas les legara. Lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producen fusilamientos perpetrados por el ejército de línea, y dos años después se convierte en el epicentro de la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).

### Capítulo III-E-20.- **Descomposición del oficialismo y atentado político (1902)**

El crimen del periodista José F. Echevarría, acontecido hace más de noventa (90) años, en Enero de 1902, en la provincia de San Juan,<sup>7880</sup> trae a colación entre otros el recuerdo del asesinato del Jefe Político del Departamento de Caseros José R. Saurit, acontecido en 1901 en Villa Casilda, provincia de Santa Fé,<sup>7881</sup> del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli,<sup>7882</sup> ocurrido en diciembre de 1897;<sup>7883</sup> el del Jefe Político del Departamento de Ayacucho, provincia de San Luis, Dr. Julio Daract Barbeito,<sup>7884</sup> acontecido en 1896 en Quinas, a manos de la policía del Gobernador Lúndor Quiroga;<sup>7885</sup> el del Diputado Nacional por Santiago del Estero Pedro García, y el del Jefe Político Arrízola, consumados en 1896, por la policía de Santiago del Estero;<sup>7886</sup> el del ex-Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos J. Costa, cometido en Bragado en

1894;<sup>7887</sup> y los asesinatos de Barrionuevo en Catamarca, y de Loza en Córdoba.<sup>7888</sup> También trae el recuerdo de la dictadura Rosista, cuando los periodistas José María Salinas,<sup>7889</sup> y Florencio Varela, fueron asesinados por la Mazorca.<sup>7890</sup>

De todos los casos citados en este trabajo, me centraré exclusivamente en el del periodista Echevarría. Gobernaba el país en ese entonces el Gral. Julio A. Roca, (a) "El Zorro", el mismo contra quien se planeó la popular insurrección Radical de 1905, y gobernaba la provincia de San Juan, el Gobernador David Chávez, un mero testaferro del hombre fuerte de San Juan, el Senador Nacional Domingo Morón.<sup>7891</sup> Chávez, a juzgar por *El Diario* era "...un pobre mozo riojano diplomado de maestro de minas en la escuela de San Juan...", que recibió "...el 'balurdo' gubernativo con la más sumisa adhesión y hasta con una complasencia personal, puesto que se le adjudicaba en premio de su obediencia la diputación nacional que deberá quedar vacante, en ese edificante y ejemplar cambalache de la gobernación por la banca".<sup>7892</sup>

La guerra de sucesión que se desató al fin de su mandato, en que el Partido Constitucional se enfrentó duramente al Partido Popular en el poder (para poder llegar a los comicios), culminó en un crimen político perpetrado en la persona de un periodista, José F. Echevarría.<sup>7893</sup> Para *El Diario*, dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de *El Tiempo*, pero con una contundencia aún mayor, el crimen de Echevarría era el resultado necesario de un plan político premeditadamente planeado. Resuelta la imposición de la candidatura del Gral. Enrique Godoy, "...se adoptó el plan que debía llevarla a buen puerto: unificar los resortes oficiales en todas las ramas de la administración y aplicar el torniquete [del agua?] a los disidentes, que se sospechaba los había".<sup>7894</sup> Esta política perduró en el gobierno de Manuel José Godoy,<sup>7895</sup> pero no podía a la larga llegar a un fin feliz. En Febrero de 1907, Godoy es derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,<sup>7896</sup> dando pie a la Intervención Nacional del Dr. Cornelio Moyano Gacitúa,<sup>7897</sup> y con ella a los tres sucesivos gobiernos del Partido Popular,<sup>7898</sup> el de Manuel Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega (1911-14).<sup>7899</sup> Pero los gobiernos del Partido Popular no acaban con los sinsabores del pueblo sanjuanino. El propio gobierno del Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al gobierno de los Godoyes. El periódico porteño *El Diario* revelaba bajo el título "La reacción en San Juan", la composición nepótica del mismo.<sup>7900</sup>

Previamente, el gobierno de Chávez-Doncel fue militarizado: la policía

"...cambió su rol normal de agente del orden en garantía de la vida y la propiedad, por el funcionamiento bélico de la persecución y la agresión a los opositores. De 70 agentes que marcaba el presupuesto, se fueron hasta 250. Se creó una sección de policía montada bajo la denominación de Escuadrón de Caballería".<sup>7901</sup>

Y como la cuestión internacional, por la posible Guerra con Chile, venía como de encargo, todo ello

"...pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de la defensa nacional. La militarización se complementó con el envío por el Ministro de la Guerra de armamento y munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de instruir la Guardia Nacional, pero que se tuvo el buen tino de consignársele al mismo candidato oficial, exclusión hecha de toda mixtura opositora ni intervención popular".<sup>7902</sup>

El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los primeros momentos del atentado:

"...pretendió hacer creer que Echevarría había caído víctima de un entrevero, durante el acto electoral tratando de librarse de la tremenda responsabilidad que el hecho inaudito arrojaba sobre él. Así se divulgó la primer noticia en San Juan y se telegrafió a esta capital. La víctima pasaría entre el montón de los caídos en la refriega del atrio [en la tristemente célebre Rinconada del Pocito], durante ese inventado ataque de la oposición a las mesas".<sup>7903</sup>

Pero no había sucedido así, como lo reveló el telegrama de *El Diario* y lo ratificaban las posteriores informaciones, Echevarría "...ha sido asesinado no el día de la elección, sino la víspera; no el domingo, sino en la noche del sábado; no en el comicio sino en una casa donde estaba de visita; no en lucha alguna, sino indefenso, al descuido y sobre seguro".<sup>7904</sup>

En cuanto al periodismo, salvo *El Herald*, órgano oficial del gobierno de la provincia dirigido por Pedro P. Calderón, el resto de los diarios era opositor, destacándose *Las Provincias*, *El Trabajo* y *El Censor*, siendo este último reconocido como el más aguerrido. En estos tres últimos periódicos trabajó Echevarría. Pero si bien Echevarría no era director ni editor de *El Censor*, era sabido que corría con el peso editorial más gravoso pues era el encargado de llevar la crónica electoral. Si bien tampoco pertenecía a la clase dominante, pues su origen era humilde, su tez morena y su pelo crespo, al extremo de ser sindicado en numerosas ocasiones de mulatillo, *La Prensa* afirmaba el 30 de Enero que el propósito de esa adjetivación era el de "...descalificarlo con una frase hueca, y aún cuando [Echevarría] conocía el camino para llegar a la titulada nobleza política, jamás la adoptó. Su virilidad y su talento valían más que todos sus adversarios unidos para atacarlo, y la prueba ilevantable no la dio él, sino ellos al arrebatarle la vida".<sup>7905</sup>

En cuanto al hecho criminal en sí, este ocurrió cuando faltaban pocos minutos para las 9 de la noche del día sábado 7 de Enero de 1902, en que la vecina de la localidad de Desamparados, Doña Ramona Ramírez, "...sintió un fuerte tropel de caballería que pasó por su casa y se paró al frente de la casa vecina, del lado Norte, donde vive Celestina Quirós, y oyó que un soldado preguntaba si estaba ahí Echevarría. Se le contestó negativamente y oído esto dijo 'Es al lado, ahí está el caballo'".<sup>7906</sup> En ese instante Doña Ramona tuvo la intuición del peligro que corría su visitante, "...corrió a la puerta de calle con intención de trancarla, pero en el mismo momento que llegaba a poner en práctica su resolución le preguntaba un individuo desde la calle, si estaba Echevarría, y ante la contestación negativa replicó 'Quite deje de embromar'".<sup>7907</sup> Dicho individuo "...empujó con violencia la puerta la abrió y penetró en la casa, seguido de dos soldados, en primer término, y de otro más atrás. Doña Ramona reconoció en el primero al Comisario de policía de la Central, Raúl Silva".<sup>7908</sup> El Comisario asaltante "...reconoció a Echevarría, que en ese momento trataba de evadirse, y lo tomó de un brazo, mientras llegaron los soldados que se apoderaron de él y comenzaron a apalearlo, llevándolo violentamente unos cuantos metros por debajo de un parral, hasta que uno de los de la partida le asestó un balazo en la cabeza, el que le produjo una herida de 10 a 12 centímetros en la región occipital frontal, con fractura del hueso".<sup>7909</sup>

El golpe que le propinaron los soldados "...derribó al suelo a Echevarría, y en tal situación, Silva dirigiéndose a un soldado le dijo: -!Tírale!. Inmediatamente sonó una

detonación y un quejido de la víctima. La bala --disparada a quemarropa, con una carabina remington-- penetró por la región sacra y atravesándole el cuerpo salió por la parte superior del muslo izquierdo. Las heridas eran gravísimas y una por lo menos mortal".<sup>7910</sup> Dos semanas después, el 22 de Enero, Manuel de Rezabal, corresponsal de La Prensa, refería que el cadáver presentaba

"...heridas penetrantes en el cráneo, interesando la masa encefálica: una de 10 cm. de longitud, visiblemente de sable, mortal. Herida de bala de remington, en la región sacra; salió la bala a la altura de la cadera del costado izquierdo, destrozando la región ilíaca y la arteria interna, como asimismo los órganos contenidos en la pelvis, mortal. Contusiones producidas por golpes de sable en la espalda. Hundimiento de los huesos del cráneo, producidos por golpes de sable y rebenque".<sup>7911</sup>

Inmediatamente de producido el asesinato, "...dos soldados tomaron por las piernas a Echavarría y lo arrastraron por el suelo, arrojándolo a la calle, como a un perro. Según la expresión dolorida e indignada de la dueña de casa, que me ha relatado estos hechos en el teatro mismo del suceso, consumado el crimen, en que los asesinos emplearon breves momentos, montaron a caballo y se dirigieron a gran galope a la ciudad".<sup>7912</sup> Una de las vecinas del sitio donde se produjo el crimen, Doña Rita Quintana, le refirió al cronista "...que ella reconoció a Raúl Silva cuando pasó frente a su casa con cinco soldados armados, que marchaban al paso de sus cabalgaduras, momentos antes de producirse el asesinato".<sup>7913</sup>

A la partida policial que encabezaba Silva "...se le unieron probablemente cuatro hombres mas, que debían estar en acecho, pues los que asaltaron la casa de la Sra. de Ramírez fueron, según esta y otros testigos oculares, ocho soldados y un sargento".<sup>7914</sup> Los mismos informantes le contaron al cronista "...que dieron parte de lo ocurrido inmediatamente a la policía central, no obstante lo cual nadie se presentó a tomar conocimiento del hecho, en toda la noche, ni en la mañana de ayer, y solo a la una de la tarde de este día, llegó a la casa el Subdelegado de Desamparados, en cuya jurisdicción se había cometido el salvaje atentado, y dio comienzo a instruir el sumario de prevención, con muy poco celo, según se desprende de lo que me han dicho mis informantes".<sup>7915</sup>

En cuanto al auxilio médico, no fue posible prestarlo porque "...no se pudo hallar a ninguno de los facultativos buscados con ese fin, y falleció dos horas después de ser herido".<sup>7916</sup> El cadáver fue recogido de la calle

"...por los vecinos que habían presenciado espantados el bárbaro crimen, y conducido a la casa de Doña Catalina Quiróz, donde permaneció hasta ayer a las 12 del día, hora en que fue traído a la casa del Dr. Victoriano Ortega [Gobernador entre 1911 y 1914], en esta ciudad, donde estuvo expuesto hasta las 6 de la tarde, hora hasta la cual la autoridad no había mandado reconocer las heridas que presentaba el cadáver".<sup>7917</sup>

Frente al cadáver, desfiló toda la tarde "...un pueblo inmenso, condenando el brutal hecho enérgicamente. A las 6 fue colocado en el carro mortuario y conducido al cementerio municipal, acompañado por más de 2.000 personas que siguieron el carro a pié y con la cabeza descubierta, en medio de un profundo silencio".<sup>7918</sup>

Según refiere el corresponsal de *La Prensa*, en las aceras, "...un gran número de gente presenciaba el triste desfile, y compartía el duelo de los acompañantes, si se ha de juzgar por las numerosas personas que vimos derramando en silencio abundantes lagrimas".<sup>7919</sup> Lo que llamó fuertemente la atención --sin que nadie pudiera explicar la causa del hecho-- fue que el piquete de caballería de la policía "...saliera al encuentro del cortejo fúnebre y desfilara de uno en fondo hasta cubrir el frente de la acera que ocupa en la plaza 25 de Mayo el Gral. Enrique Godoy, candidato oficial a la gobernación de la provincia, donde hizo alto. Pero si no hubo explicación hubo amargas censuras, y enérgicos comentarios".<sup>7920</sup> El cortejo fúnebre, fue "...uno de los más numerosos sino el más, que ha sido visto en esta ciudad. Fue una protesta enérgica, aunque muda, contra todos los que han participado en este hecho bárbaro y sangriento, y contra el hecho mismo que demuestra el grado a que han llegado los procedimientos brutales y la profunda perversión de los individuos que tienen en sus manos el Gobierno de la provincia".<sup>7921</sup>

Para terminar, el corresponsal de *La Prensa* agregaba que los autores del crimen "...se paseaban tranquilamente por las calles de la ciudad hasta las 10 de la mañana según informes que he recibido".<sup>7922</sup> En el peristilo del cementerio, el anciano Pedro Elizondo "...pronunció un breve y enérgico discurso, que causó honda impresión en el ánimo de todos los oyentes. Corre el rumor en el público, de una manera general e insistente, que Don Ramón Barrera, otro de los redactores de *El Censor*, va a ser asesinado como Echevarría".<sup>7923</sup>

Con motivo de la conmoción causada por el crimen, *El Censor* suspendió la publicación mediante un Manifiesto dirigido a toda la república, que reproducimos por separado, y casi todas las redacciones de los diarios del país enviaron a San Juan a sus mejores cronistas. Así tenemos que entre otros *La Nación* de Buenos Aires envió a A. J. Cevallos, *El País* a José A. Cortejarena,<sup>7924</sup> *La Capital* de Rosario al Sr. Romualdo Pizarro, y *La Prensa* de Buenos Aires a Manuel de Rezábal.<sup>7925</sup> El corresponsal de *La Nación*, en un artículo fechado el día siguiente del crimen, trataba de brindar a su crónica cierta perspectiva histórica, pues decía que

"...hace cincuenta años, cuando el país se hallaba agitado por todas las convulsiones de su formación orgánica, estos excesos se explicaban, aunque no pudieran justificarse. Ahora son, antes que todo un anacronismo, un horrendo y feroz anacronismo. El oficialismo de San Juan tiene que estar cegado por sus delirios de omnipotencia inviolable cuando no se da cuenta de que un acto como el que ha consumado es el más irresistible estandarte que puede levantar en contra suya, la demostración más evidente y ostensible de la oligarquía en que reposa. Se ha apagado una voz esforzada y viril, pero queda el recuerdo de la víctima como una acusación y como un castigo. Estas sanciones no son inmediatas pero son fatales: con el asesinato de Echevarría, el imperialismo de San Juan ha puesto su lápida".<sup>7926</sup>

El caso no era ya de política provincial; "...es una cuestión que nos afecta a todos, porque es el pueblo argentino el que ha de aparecer ante el extranjero aceptando el asesinato como régimen político. Un gobierno que ha perpetrado este crimen debe ser, pues, derrumbado, porque ha lanzado un desafío contra la opinión nacional, pretendiendo iniciar una regresión a épocas que están irrevocablemente cerradas".<sup>7927</sup>

Para *El Tiempo*, periódico dirigido por Carlos Vega Belgrano, cualquiera que se hubiese preocupado de seguir de cerca la política local sanjuanina, "...hubiera podido notar desde hace tiempo síntomas evidentes de que aquello no podía terminar tranquilamente, de que la elección de nuevos gobernantes marchaba recta y rápidamente a soluciones sangrientas".<sup>7928</sup> El Gral. Roca tendría en este caso una doble autoridad: "...como supremo magistrado argentino, debe velar por la dignidad nacional en el extranjero, y ese chorro de sangre que ha salpicado a San Juan mancha a toda la República, como Jefe de partido, debe imponer a sus afiliados una política más decente, ya entre sus partidarios se ha producido el escándalo".<sup>7929</sup> La muerte del periodista Echevarría habría sido, para *El Tiempo*, un mero incidente, "...si ella no respondiera a la ejecución de un verdadero plan general contra la oposición sanjuanina, plan destinado a causar muchas víctimas todavía, a imponer un régimen de sable y espuelas en un Estado Argentino, a cimentar un gobierno sobre bases manchadas de lodo, teñidas de sangre y rodeadas de desprecio, de la execración de un pueblo que en estos momentos vibra estremecido de cólera por el ultraje recibido. Al asesinato de Echevarría sucederán otros. Es, fatalmente lógico. No nos atrevemos a insinuarlo siquiera".<sup>7930</sup> Pero para los que están arriba, "...los que pueden ver desde muy alto estas cosas, deben saber que en San Juan brota ya la semilla de una revolución, germinada al calor de la sangre criminalmente derramada por un comisario y cuatro gendarmes que todavía se pasean por las calles en vez de estar agarrotados a la sombra de cuatro paredes y sujetos al fallo de la justicia".<sup>7931</sup>

Y para *El Diario*, dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de *El Tiempo*, pero con una contundencia aún mayor, el crimen de Echevarría era el resultado necesario de un plan político premeditadamente planeado. Resuelta la imposición de las candidaturas oficiales, "...se adoptó el plan que debía llevarla a buen puerto: unificar los resortes oficiales en todas las ramas de la administración y aplicar el torniquete a los disidentes, que se sospechaba los había".<sup>7932</sup> Previamente, el gobierno fue militarizado: "...la policía cambió su rol normal de agente del orden en garantía de la vida y la propiedad, por el funcionamiento bélico de la persecución y la agresión a los opositores. De 70 agentes que marcaba el presupuesto, se fueron hasta 250. Se creó una sección de policía montada bajo la denominación de Escuadrón de Caballería. Y como la cuestión internacional [la posible Guerra con Chile] venía como de encargo, todo ello pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de la defensa nacional".<sup>7933</sup> La militarización se complementó "...con el envío por el Ministro de la Guerra de armamento y munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de instruir la Guardia Nacional, pero que se tuvo el buen tino de consignársele al mismo candidato oficial, exclusión hecha de toda mixtura opositora ni intervención popular".<sup>7934</sup>

El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los primeros momentos del atentado, pretendiendo "...hacer creer que Echevarría había caído víctima de un entrevero, durante el acto electoral tratando de librarse de la tremenda responsabilidad que el hecho inaudito arrojaba sobre él".<sup>7935</sup> Así se había divulgado en la primer noticia que provino de San Juan y desde ahí se había teleografiado a esta capital. Según esta versión la víctima "...pasaría entre el montón de los caídos en la refriega del atrio [en la tristemente célebre Rinconada del Pocito], durante ese inventado ataque de la oposición a las mesas".<sup>7936</sup> Pero no, había sucedido tal como lo revelaba el telegrama de El Diario y lo ratificaban las posteriores informaciones, pues Echevarría fue "...asesinado no el día de la elección, sino la víspera; no el domingo, sino en la noche del sábado; no en el comicio sino en una casa donde estaba de visita; no en lucha alguna, sino indefenso, al descuido y sobre seguro".<sup>7937</sup>

Al día siguiente, 9 de Enero, **La Prensa** ratificó que la policía con sus empleados superiores "...ha sido la que realizó el siniestro complot, la que quiso castigar y castigó de una manera criminal y salvaje las valentías de un periodista independiente, las energías cívicas de un hombre de bien inspirado e incapaz de ceder a ningún propósito que no consultase el bien público".<sup>7938</sup> Para el corresponsal de La Prensa, "...la audacia no tiene ejemplo en el país; "...uniformados y armados han cruzado la ciudad, y como obedeciendo con firmeza a un plan han buscado tranquilamente a la víctima; y cuando la encontraron, sin cuidarse de testigos, sin reparar en ellos siquiera, le dieron muerte y arrastraron brutalmente el cadáver hasta dejarlo en medio de la calle".<sup>7939</sup> Después de cometido el crimen "...ni por simple fórmula, ni para llenar las farisaicas apariencias llegó la policía hasta el lugar del crimen. ¿Que querían probar con esa conducta? Sin duda alguna, notificaban a la sociedad sanjuanina, que no debía contar con ninguna seguridad pública, que allí no había ni podía haber garantía alguna, para los que se permitiesen pensar en desacuerdo con la voluntad del oficialismo."<sup>7940</sup>

Como es posible creer, se preguntaba **La Prensa**, "...que un plan tan siniestro haya sido ejecutado sin acuerdos previos, sin ordenes terminantes o sin las insinuaciones e incitaciones a los subalternos en él complicados? Desde luego, todos tienen ya conocimiento que los criminales se han paseado después del hecho sin que la policía se apresurase a reducirlos a prisión, y aún hoy, no sabemos cuales son las medidas adoptadas para iniciar un proceso tan delicado y urgente".<sup>7941</sup> Allá en San Juan, "...forzosamente tiene que reinar el terror, no es posible creer que los testigos del mismo proceso hablen como debiera hacerlo, desde que nadie tiene asegurada la tranquilidad personal, desde que no existe ninguna autoridad constituida de acuerdo con la Constitución, y que pueden ofrecernos garantías necesarias a todos los ciudadanos".<sup>7942</sup>

Dos días más tarde, el 11 de Enero, bajo el título: "Crímenes Oficiales", **La Prensa** advierte en los Informes del Gobernador David Chávez y del Jefe de Policía Saúl Quiroga, pariente del candidato gubernativo Gral. Enrique Godoy, el propósito de desnaturalizar el crimen, pues "...en el primero dándole un carácter personal, en el segundo preparándole circunstancias atenuantes que en el sumario podrían traducirse en alguna resistencia a mano armada por parte de la víctima. Desde luego el gobierno se anticipa a acusar a la prensa de esta capital por los juicios publicados. Cree que aquí se ha desnaturalizado el hecho, y no deja de abrigar la esperanza de que con sus informaciones se restablecerá una verdad nueva".<sup>7943</sup> Pero **La Prensa** ironiza que "...San Juan está en la República Argentina y no en el lejano imperio celeste. Aquí conocimos todos, periodistas y particulares, el estado en que se encuentra la provincia, dominamos todos los detalles políticos y administrativos de su círculo oficial, y no son escasas ni limitadas las vinculaciones de todo orden que existen entre las dos sociedades".<sup>7944</sup>

Para que un Comisario del Departamento Central de Policía "...haya cometido un crimen en un barrio central, aún cuando administrativamente sea otro Departamento, debió conocer algo mas que el deseo personal de cometer un crimen".<sup>7945</sup> El estímulo para el crimen "...lo ha encontrado cuando menos en el ambiente, sin contar que cuando fue hacia Desamparados a buscar al periodista que un día después haría la crónica escandalosa del fraude electoral, llamaría a sus autores por sus nombres y abriría el juicio más severo ante la opinión de la misma provincia, la policía atacaba a los opositores frente a la iglesia de San Agustín y en la esquina de Santo Domingo, y apaleaba y llevaba presos a los más caracterizados".<sup>7946</sup>

Habiendo transcurrido otros dos días más, el 14 de Enero, bajo el título: "Política Sanjuanina. La Delegación del Partido Constitucional", **La Nación** reveló que la persecución a los periodistas, "...es una regla corriente incorporada a los recursos políticos del gobierno. Todos los redactores de diarios adversos a la situación han recibido iguales amenazas que Echevarría, sufren las mismas persecuciones y tienen que vivir en constante zozobra, substrayéndose a la acción de la policía, que cuando no se ejerce con el puñal se ejerce con las prisiones y los atropellos ilegales".<sup>7947</sup> El Dr. Doroteo Basáñez, vocero del Partido Constitucional, le dio al corresponsal de **La Nación** a este respecto "...algunos datos que muestran a la provincia como un feudo señorial en que los siervos están sometidos a una voluntad única e incontestable".<sup>7948</sup>

El Sábado 18 de Enero, la Junta Ejecutiva del Partido Constitucional desautoriza categóricamente las afirmaciones del Gobernador Interino de la Provincia Pedro Doncel, con motivo del asesinato del periodista Echevarría, contenidos en un telegrama dirigido al Círculo de la Prensa y publicado recientemente en esta ciudad. El Sr. Gobernador desautorizó a sabiendas el bárbaro crimen, cometido por agentes de la policía. "...No ha sido un delito de carácter personal y privado, sino un asesinato político perpetrado con lujo de ensañamiento y barbarie, como lo demuestran a la evidencia las circunstancias y el numeroso acompañamiento de fuerza policial y los antecedentes que el Gobernador conocía personalmente, porque el mismo Echevarría, según referencias inmediatas, le denunció en la mañana del 1o. del corriente mes el asalto del victimario Silva en la calle pública, llevado a cabo en la tarde del día anterior, con la amenaza de matarle a balazos o puñaladas si continuaba escribiendo contra la policía, a cuyo efecto le buscaría en cualquier parte, pues tenía orden de proceder así. Además **El Censor** denunció en su número del 2 estos hechos, dirigiendo exclusivamente su reclamo al Gobernador Interino y manifestó que desde tiempo atrás el Sr. Echevarría venía siendo objeto de asechanzas y emboscadas de la policía".<sup>7949</sup> Era falso para el réporter de **El Tiempo**, que inmediatamente de conocer la perpetración del crimen "...la autoridad ordenase la prisión de los culpables, quienes permanecieron en libertad casi toda la mañana del siguiente día y dicha autoridad brilló por su ausencia en el lugar del suceso hasta la tarde de este día en que se presentó cuando su concurrencia carecía en absoluto de objeto. No se explica satisfactoriamente que el Gobernador asegure que la justicia castigará severamente a los delincuentes ya que ese magistrado no tiene intervención legal en los procedimientos y resoluciones de los jueces".<sup>7950</sup> La aserción de que Echevarría no era director ni editor de **El Censor** era para **El Tiempo** una puerilidad "...pretendiendo significar con ello que el crimen no se ha consumado en la persona de un miembro de la prensa independiente, pues era público y notorio que aquel distinguido ciudadano desempeñaba el rol de redactor permanente del diario, siendo justamente por esto que el Sub-comisario Silva lo agredió y amenazó en la vía pública, por orden superior, según dijo. Firman: Juan Maurín, presidente; Victoriano Ortega, Secretario; y José A. Correa, Secretario".<sup>7951</sup>

Tres días después, el 21 de Enero, el corresponsal de **La Prensa** pudo hablar con el procesado Subcomisario supernumerario Silva, y lo describe como "...un joven de 19 años, de elevada estatura, temperamento sanguíneo, blanco, rosado, cabello negro, barba naciente, ojos azules".<sup>7952</sup> Como el hermano de Silva "...fue empleado de policía durante tres años, procuré que hablara con su hermano. Lo conseguí, y después de una larga y secreta conferencia que tuvieron los dos volví a verlo. Había llorado mucho y se mostraba abatido. Después de algunas vacilaciones, y como quien repite una frase extraña a la propia voluntad me dijo: 'Usted puede ver el sumario que me han formado. Allí están mis

declaraciones".<sup>7953</sup> Luego de esta expresión, Silva "...enmudeció y solo contestaba a mis preguntas con ligeros movimientos de cabeza. Cuando me despedí, se fue a su prisión como angustiado por el deseo de hablar y el temor de hacerlo. ¿Que misterio puede quedar oculto, entre las declaraciones del sumario que me indicaba? ¿Como puede haberlo guiado el propósito de una venganza personal como se ha dicho, si no conoce a su víctima?".<sup>7954</sup>

Otros tres días después, el 24 de Enero, el corresponsal de *La Prensa* transcribe la declaración del soldado Ismael Gallardo, uno de los que participaron de la partida asesina, quien manifestó que luego del crimen "...seguimos para la Intendencia, donde los comisarios [Carlos] Laciari y [Raúl] Silva nos reunieron y nos dijeron que no habláramos del asunto, y que todo debía quedar entre nosotros. El Comisario Laciari nos dijo entonces, que contáramos que Echevarría había herido con un cuchillo a un farolero, y que se había resistido cuando íbamos a prenderlo".<sup>7955</sup> Al día siguiente, 25 de Enero, frente al Director de La República de Rosario, Sr. Romualdo Pizarro, el Alcalde de la Cárcel y el Jefe del piquete guardia de Cárcel, y con permiso del Juez Salvador Maradona, el imputado Subcomisario Silva nos confesó que "...Laciari fue quien lo mandó matar a Echevarría!...Yo no lo maté, y siguió su narración así".<sup>7956</sup>

Veinte días después de ocurrido el crimen, el 28 de Enero, *La Prensa* concluye con su propio veredicto, que fue demorado adrede para no interferir con las crónicas enviadas por su propio corresponsal: "...De la policía salieron los asesinos, y a la policía volvieron, y en la policía los acogen con extrañas demostraciones de compañerismo...!La única excusa, presentada en descargo, a manera de atenuante, por el Gobernador y los prohombres de la situación, está destrozada. El asesinato de Echevarría, dijeron, ante el país, fue una venganza personal. ¡Falso! El Sub-comisario Silva jamás tuvo el menor incidente con el periodista mártir, a quien ni siquiera conocía. El crimen está definido en esos detalles".<sup>7957</sup> Para *La Prensa*, se trata de "...un crimen político, cobardemente ejecutado y al que se ha tratado de desnaturalizar en la policía misma, en aquella policía que para vergüenza de aquel gobierno, y de la provincia y del drama electoral consumado, sigue en el mismo pie, con los mismos empleados, interviniendo en todos los actos preliminares del sumario, revelando su influencia interesada sobre toda la administración pública".<sup>7958</sup> Veinte años después, un autor refirió que el verdadero motivo del crimen obedeció a que Echevarría había publicado que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, era hijo del matador del Gral. Nazario Benavídez.<sup>7959</sup>

Esta política represiva perduró en los gobiernos del General Enrique Godoy y de Manuel José Godoy,<sup>7960</sup> pero no podía a la larga llegar a buen puerto.<sup>7961</sup> En Febrero de 1907, Manuel Godoy es derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,<sup>7962</sup> dando pie a la Intervención Nacional del Dr. Cornelio Moyano Gacitúa,<sup>7963</sup> y con ella a los tres sucesivos gobiernos del Partido Popular,<sup>7964</sup> el de Manuel Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega (1911-14).<sup>7965</sup> Pero los gobiernos del Partido Popular no acaban con los sinsabores del pueblo sanjuanino. El propio gobierno del Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al gobierno de los Godoyes.<sup>7966</sup> El periódico porteño El Diario revelaba bajo el título "La reacción en San Juan", la composición nepótica del mismo,<sup>7967</sup> y bajo el titular "El periodismo en San Juan", las peripecias del periodismo en general,<sup>7968</sup> y del periodista P. P. Ramírez, director del diario San Juan en particular.<sup>7969</sup>

## **Manifiesto de El Censor**

"La campaña de crímenes que la policía de la provincia ha emprendido contra la vida de los periodistas de oposición, y especialmente de los miembros de la redacción de este diario, hace imposible por ahora la publicación de El Censor. Su redactor principal, Sr. José F. Echevarría, ha sido salvajemente asesinado por una horda policial, cumpliendo la amenaza cobarde, lanzada a voz en cuello, de matarle como a perro, amenaza que denunciamos oportunamente [El Censor, 2-I-1902], con la enérgica condenación que merecía, que fue denunciada personalmente por la víctima al Gobierno de la provincia, sin que se adoptase disposición alguna tendiente a impedir su realización. Este crimen premeditado y alevoso, consumado con violación de domicilio y con lujo de enseñamiento y profanación del cuerpo exánime de la víctima, ha merecido unánime reprobación y ha provocado la indignación más honda y vibrante en el seno de esta sociedad, ultrajada en sus más nobles y tiernos sentimientos. Pero nada importa a la malvada oligarquía y sus agentes inconscientes la condenación de sus crímenes, pronunciada por el pueblo entero con emoción profunda y en la forma imponente de la tocante ceremonia fúnebre de ayer. Siguen adelante con locura frenética, en su carrera de exterminio, y en todas partes anuncian, con el desvergonzado coraje de la impunidad asegurada, los nombres de las personas cuyo asesinato ha sido decretado por la autoridad para castigar el crimen de lesa majestad que constituye la censura periodística al bárbaro sistema implantado por la oligarquía feroz que falsifica la voluntad popular, que roba, que aprisiona y que mata a mansalva a fin de conservarse y aprovechar el trabajo del pueblo sin sufrir molestias de ninguna clase. La mazorca sanjuanina ha resuelto matar la prensa honrada y valiente recurriendo al asesinato de los hombres, porque los diversos medios que antes ha puesto en juego no le han dado resultados definitivos. Pero esta victoria oprobiosa que arroja una eterna mancha de infamia al nombre de sus autores, es fugitiva. El genio del mal no gobernará perennemente las conciencias, los réprobos serán vencidos por los justos. La perversidad y el crimen no tendrán imperio duradero porque no son la condición normal de la humanidad. Los miserables se hundirán bajo el peso formidable de sus faltas, si antes no caen cediendo al empuje incontestable de los buenos, fuertes en la unión de sus nobles ideales y de la santa acción de sus obras. Mientras la noche oscura del crimen no sea iluminada por la redentora luz de la justicia, mientras no se obtenga por lo menos, la seguridad de la existencia individual para quienes sostienen en la prensa el imperio de la ley y del derecho, El Censor suspende su publicación".<sup>7970</sup>

### **Epílogo Sección III-E**

En esta sección donde estudiamos los crímenes políticos, encontramos que el crimen político acontecido en San Juan en 1884, que aquí hemos tomado como paradigmático, se inscribe en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba, 1810) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de

dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción moderada.

La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad.

Y en cuanto al ajusticiamiento del soldado de filiación Radical ocurrido en Formosa en 1891, lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producían fusilamientos perpetrados por el ejército de línea. Dos años más tarde, los fusilamientos se convirtieron en el agravio más doloroso que disparó la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).

### **Sección III-F      Putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del orden estatal-republicano**

Cuanto mayor es el número y la intensidad de los putschs, secesiones, golpes y revoluciones en el seno de un régimen político determinado mayor es el grado de deslegitimación del mismo.

Habiendo en la sección anterior tratado los crímenes políticos en la degradación del orden republicano, en la sexta sección nos dedicaremos a investigar los putschs, las secesiones y revoluciones en la crisis del orden estatal, que desarrollamos en siete capítulos consecutivos: el colapso del estado absolutista (1808-1830), la crisis del estado Confederado (1852-1861), el rol piamontés del enclave nacionalista porteño (1861-1866), el *¡Error! Marcador no definido.* **Putsch** en el interior como detonador de la Revolución del 90, el impacto desestabilizador de la Revolución del 90, la ruptura del Acuerdo e interna del Autonomismo (P.A.N.), y la excepcionalidad ficticia del caso argentino en el cono sur (golpes de estado en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile).

#### **Capítulo III-F-21.**

##### **Colapso del estado absolutista y anexión portuguesa de la Banda Oriental o estado cisplatino (1808-1830)**

Entre los seguidores de una interpretación positivista (Canter, 1929), la llamada Revolución de Independencia o de Mayo no fue obra de una sola entidad conspirativa (militar y capitular corporativa), sino que fue el resultado de la acción conjunta de varios grupos políticos divergentes que coincidieron finalmente en un objetivo común. Canter, siguiendo probablemente a Ramos Mexía (1887), García (1900), y Groussac (1907; y por otro lado Corbellini (1950), Reyna Almandóiz (1957) y Zorraquín (1961) siguiendo al propio Canter, pretendieron explicar la constitución de esos grupos mediante el estudio de los votos emitidos en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. A diferencia de Corbellini (1950), quien analiza a los promotores de la Revolución de Mayo según sus profesiones, para Zorraquín (1961), quien basaba la estructura del estado indiano en la armonía de las tres fuerzas sociales o elementos directivos (religiosa, política, y económico-social), el mismo grupo histórico debe ser analizado pero a la luz de sus categorías sociales.

Las categorías sociales superiores de la sociedad porteña estaban, según Zorraquín, divididos en cinco grupos principales (los funcionarios, los sacerdotes, los vecinos de mayor categoría social, los militares criollos, y los intelectuales burgueses). De esos cinco grupos había, según Zorraquín, tres grupos que en esos momentos ya no ejercían íntegramente su antigua preponderancia. Las autoridades políticas desprestigiadas desde las Invasiones Inglesas, las instituciones religiosas sometidas por el Patronato Real, y la institución capitular vencida el primero de enero de 1809, habían dado paso a “las nuevas fuerzas que con las armas y el pensamiento dominaron incontrastablemente el desarrollo de los sucesos durante la semana de Mayo”. De los grupos restantes Zorraquín llega a la conclusión de que el movimiento revolucionario fue la obra conjunta de los militares criollos y de los intelectuales burgueses.

Estos dos grupos, siguiendo el criterio de Zorraquín, aspiraban al poder político en cuotas de intensidad diversa. Mientras los militares criollos pretendían el monopolio del poder (la independencia absoluta), los intelectuales burgueses se conformaban con compartir el poder en una suerte de independencia relativa con tal de poder aplicar un ideario reformista. Más aún, en un claro intento por desvalorizar una hipotética naturaleza radical de la Revolución de Mayo, Zorraquín asegura que los propósitos de los revolucionarios no fueron sociales ni económicos, sino eminentemente políticos: “Ni querían perseguir a otras clases, ni aspiraban a implantar reformas fundamentales en el régimen de propiedad, el trabajo o el comercio. Querían en cambio organizar un gobierno propio —lo cual tenía que conducir tarde o temprano a la independencia—y orientar a ese gobierno conforme a las ideas que entonces predominaban universalmente”.<sup>7971</sup> La revolución no tuvo, por lo tanto, para Zorraquín, el aspecto de una lucha social entre clases diversas y opuestas. Difiriendo con Zorraquín, para Ramallo (1974) hubo tres grupos revolucionarios y no dos. Los tres tuvieron su origen en las invasiones inglesas, y fueron conducidos, respectivamente, por quienes ansiaban la independencia de los franceses, por quienes anhelaban la independencia de España sin cambios profundos, y finalmente por quienes deseaban esto último más reformas radicales.

También hubo otros historiadores nacionalistas (Marfany, 1948, 1958, 1961; Martínez Zuviría, 1960; Ibarguren, 1956, 1964) que, extremando una interpretación elitista que atribuye el papel motor de la historia al rol de los individuos, caracterizan la denominada “revolución de mayo” como un mero golpe de estado, reducen su autoría exclusivamente al estamento militar y niegan que en dicha revolución haya participado

el bajo pueblo o que se haya propuesto liberar a los indios y los esclavos. El corolario lógico de esta corriente historiográfica, aunque referido al presente siglo, lo hallamos en *Los Que Mandan* de José Luis de Imaz.

Sin embargo, aquellos historiadores de una tradición positivista tardía (Levene, 1911; Levillier, 1912; Ingenieros, 1918) que se negaron a reconocer como factor eficiente en la gestación de la denominada revolución de independencia al rol jugado por los cabildos municipales se refugiaron en una interpretación puramente ideologista. Ellos atribuían las raíces del proceso de autodeterminación exclusivamente a la influencia ideológica y política de las revoluciones americana y francesa. Para ellos los cabildos eran corporaciones oligárquicas, parodias de los consejos municipales de Castilla abolidos por Carlos V luego de la batalla de Villalar, que se oponían al progreso material y se resistían a la organización de la nacionalidad.

En forma muy reciente, Pimenta (2002) y Di Meglio (2006) influidos por la lectura de los estudios subalternos y los trabajos de Domínguez (1985), Guerra (1998) y León Solís (2002), incursionaron en el rol del bajo pueblo para entender la problemática de la denominada Revolución de Independencia.<sup>7972</sup> Por el contrario Ternavasio (2007) indaga en el debate acerca de la división de poderes. Frega (1998) y Pimenta abundan en el rol que le cupo en la historia de la Banda Oriental al movimiento Artiguista y a los 33 Orientales.<sup>7973</sup> Y Di Meglio incursiona en los enfrentamientos entre Saavedristas y Morenistas durante el inicio mismo de la Revolución de Mayo, para luego describir las movilizaciones del bajo pueblo en ocasión del desplazamiento de la facción Morenista, en las cuales intervinieron los ediles Tomás Grigera y Joaquín Campana.<sup>7974</sup> También relata los putschs ocurridos entre la tropa miliciana, tal como el caso del Motín de las Trenzas durante el gobierno del Segundo Triunvirato, o la sublevación de Álvarez Thomas y el fusilamiento del Cap. Úbeda (1815).<sup>7975</sup>

Con relación a la disolución de la Asamblea Constituyente y al derrocamiento del Director Supremo Alvear en la insurrección de 1815, Ternavasio alude al Proceso judicial incoado a los Diputados y miembros del poder ejecutivo, y Pimenta (2002) a la anexión portuguesa de la Banda Oriental y al tácito aval prestado por el Directorio.<sup>7976</sup> Por el contrario, Di Meglio abunda en las conspiraciones y los motines, por ejemplo cuando en 1820 se desató la caída del último Directorio (Pueyrredón) y ocurrió el acontecimiento de los tres gobernadores simultáneos (1820).<sup>7977</sup> Como pertenecer al ejército era una condición para influir en los bajos estratos de la población, Di Meglio detalla detenidamente el levantamiento de 1820 y el rol crítico desempeñado por los oficiales Pagola, Soler y Dorrego.<sup>7978</sup> Por último, Di Meglio se explaya en los contenidos y consignas expresados en el Motín de Tagle (1823).<sup>7979</sup> También Di Meglio concluye haciendo referencia al rol de la plebe urbana, al fusilamiento de Dorrego (1828) y a la guerra con el Imperio.<sup>7980</sup> Finalmente, Di Meglio sugiere que la participación de la plebe en la política porteña persistió en las maquinarias partidarias del Mitrisismo primero y del Radicalismo más luego.<sup>7981</sup>

- V-I Desequilibrio en la balanza del poder político.
- V-II Reminiscencias de la política colonial.

### **Introducción del capítulo III-F-22**

Al haberse visualizado la representación política, en lo que iba del siglo XIX, en términos territoriales y no poblacionales, las elites se habían polarizado regionalmente.<sup>7982</sup> Por ello son aplicables en este estudio las tesis del desequilibrio en la balanza del poder continental (Cono Sur), de Morgenthau (1992); de las alianzas políticas, de Fontana (1977); el modelo de Walt (1987), originado en la moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, y las teorías de la secesión política, de Buchanan (1991a, 1997). En este contexto teórico se inscribieron también los procesos de aceleración del transporte y las comunicaciones fluviales y marítimas. El modelo de Walt (1987), alcanza también a la ciencia y la historia políticas. Cuanto mayor era la asimetría o capacidad relativa de una provincia, tanto más atractivo era ser su aliado.<sup>7983</sup> Las coaliciones entre provincias duraban tanto como eran útiles para contrarrestar la amenaza que enfrentaban. A medida que aumentaba la capacidad relativa de una provincia, crecía su habilidad para disuadir o derrotar por sí mismo la amenaza. Por el contrario, a medida que la asimetría o capacidad relativa de una provincia disminuía, su valor como aliado o disuador declinaba, estimulándolo a concretar coaliciones.<sup>7984</sup> En el centro de las cuestiones sucesorias provinciales, tomados como si fueran estados independientes, pareciera ser que estaba presente la vieja cuestión de la conflictividad interna versus la conflictividad externa (guerra de sucesión nacional) y la transmisión intergeneracional o del ciclo de vida del compromiso político, de Converse (1969).<sup>7985</sup>

El ciclo o transición histórica en que este período (1852-1862) está inscripto, nació por fractura o colapso, en el episodio de la caída de Rosas (1852) y la promulgación de la Constitución de 1853. Dicha transición u ola (1852-62) vino a coincidir con la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848-1875),<sup>7986</sup> y con el tercer ciclo ideológico de Rivarola (1936). Dicha ola reaccionó contra la tercer contraola regresiva (1826-1852), pero mantuvo en su seno una profunda crisis de rivalidad o desajuste, que alimentó el análisis histórico acerca de las guerras y los crímenes políticos. En realidad, la fase histórica que se inició con Caseros (1852) y el Acuerdo de San Nicolás (1852) --la primera dentro de la llamada Organización Nacional (cuarta ola progresiva, 1852-1880)--<sup>7987</sup> fue una transición desde una etapa marcada por la hegemonía de una coalición Confederada de signo Urquicista a otro período sellado por la supremacía de una coalición Liberal de signo Mitrista.<sup>7988</sup> El Acuerdo de San Nicolás, a diferencia del Pacto Federal de 1831, fue eficiente, aunque con coacción, pues configuró una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre engendrada por la actitud de los gobiernos provinciales, heredados del régimen Rosista, y para afianzar la nueva institucionalidad constitucional (representativa, republicana y federal). Sin embargo, su eficiencia no alcanzó para retener en la Confederación al Estado de Buenos Aires, que tras el Pronunciamiento del 11 de septiembre de 1852, se emancipó de la Confederación, provocando con ello una situación de secesión que se perpetuó durante una década, hasta tanto se produjo la batalla de Pavón y el pacto implícito resultante (1862). Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, los recursos con que contaron, las reglas de resolución de conflictos, el equilibrio en la balanza del poder, las innovaciones

científico-tecnológicas, las reformas institucionales, las opciones que enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los actores.<sup>7989</sup>

En cuanto a las causas de la transición política que significó el período de la Organización Nacional, que se inició a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX (1852-1880), diversos autores la encuentran en la vigencia de las fracturas modernas (ideológicas y políticas). La débaque de la hegemonía intelectual y moral del pensamiento conservador (Revolución del 48 en Alemania y Francia), acosado por la intelectualidad liberal exilada, estuvo inspirada en parte en los denominados Doctrinarios franceses.<sup>7990</sup> Las luchas libradas contra el Papado y por la unidad de las nacionalidades del centro y sur de Europa (Italia y Alemania), y el auge del librecambismo necesariamente debieron haber jugado un rol determinante.<sup>7991</sup> También la progresión moral que significó la elaboración, debate y divulgación de Constituciones y Leyes y la preponderancia otorgada a las virtudes intelectuales anticlericales.<sup>7992</sup> En esta transición, tuvieron preponderancia el pasaje de los conflictos internacionales, de un clivaje dinástico a uno nacional; el pasaje de un clientelismo carismático o caudillesco a uno notabiliar; y el tránsito de un clivaje vertical (regional) a uno horizontal (nacional). La intensa rivalidad que se dio entre caudillos militarizados y regionalizados (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), influenciados ahora por ideologías e intereses antagónicos, habrían erosionado el arbitraje y el monopolio del poder político central (primero el de Rosas y luego el de Urquiza).<sup>7993</sup> Los patrones institucionales heredadas del mercantilismo español (proteccionismo y soberanía territorial de los estados nacionales), se habrían trabado en conflicto con la veloz recepción de innovaciones tecnológicas de naturaleza vial (aplicación del vapor a la industria del transporte terrestre, fluvial y marítimo),<sup>7994</sup> y de reformas institucionales (administraciones nacionales de puertos) que alentaban la aplicación de los principios de la libre navegación de los ríos, garantizados por el Congreso de Viena.<sup>7995</sup> Asimismo, los patrones de producción, y de la geografía económica de los espacios interiores,<sup>7996</sup> se habrían trabado en conflicto con la rápida recepción de innovaciones de corte tecnológico (aplicación del acero al alambrado de los campos),<sup>7997</sup> y de reformas institucionales (administraciones e instalaciones sanitarias).<sup>7998</sup> Finalmente, la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848-1875), la quiebra del proteccionismo agrícola inglés (Corn Laws), el auge de la industria textil británica, y las Guerras de Crimea y de Secesión Norteamericana, habrían ejercido al desatarse en el Río de la Plata una presión comercial e industrial considerables.<sup>7999</sup>

Este rico complejo de causas e ideas nos han sugerido formular otra serie de reflexiones:

- a) ¿las coaliciones políticas que protagonizaron la cuarta ola progresiva (1852-1880) indican la ruptura con la vigencia de una restauración absolutista, y el inicio de un auge político, económico y cultural que perduró hasta mediados de la segunda mitad del siglo XIX?;
- b) ¿la diferente intensidad de la transición del Caudillismo al Republicanismo, obedeció a estructuras socio-demográficas, políticas y económicas propiamente locales o, por el contrario, obedeció a factores de índole nacional?
- c) ¿que factores intervinieron para que las rupturas y crisis políticas provinciales -Córdoba en 1858; Mendoza en 1859; San Juan en 1852, 1857, 1860 y 1861; Corrientes en 1859 y Tucumán en 1861; (Cuadro I)-- padecieran de una

arritmia tan marcada (mientras Buenos Aires avanzó a formas republicanas de gobierno otras provincias que lo estuvieron (San Juan y Tucumán) revirtieron a formas caudillescas)?

- d) ¿los crímenes de la Mazorca,<sup>8000</sup> y el ajusticiamiento de Camila O'Gorman, tuvieron algún impacto en el clima político que precipitó la batalla de Caseros, y la revolución del 11 de Septiembre de 1852 por la que Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina?;
- e) ¿la Revolución del 11 de Septiembre de 1852, por la que Buenos Aires secesionó o se separó de la Confederación Argentina, tuvo algún efecto dominó en las sucesivas crisis, crímenes y rebeliones ocurridas en Uruguay (Hecatombe de Quinteros, 1858); Corrientes (1859); San Juan (1859, 1861); Tucumán (1861) y Bolivia (1861)?;
- f) y h) ¿estas últimas crisis y la declaración de guerra de los estados de la Unión Americana (USA) contra los estados secesionistas y esclavistas de la Confederación sudista (1861) produjeron algún efecto en la rebelión porteña que dio lugar a la batalla de Pavón (1862) y más luego a la declaración de guerra contra el Paraguay?,

#### **V-I El desequilibrio en la balanza del poder político.**

Aparentemente, desde 1847 la Cuenca del Río de la Plata habría experimentado un fuerte shock político con la llamada Guerra Grande en la Banda Oriental, y con la epopeya de la Defensa de Montevideo contra la coalición Rosista.<sup>8001</sup> Cundió así un profundo desequilibrio en la balanza del poder político, que se había iniciado con la Misión Bellegarde al Paraguay (1849-52), interesada en alcanzar la libre navegación del Río Paraguay, río arriba hasta el sur del Matto Grosso;<sup>8002</sup> continuó con la Secesión de Entre Ríos de la Confederación Argentina (1851), el Tratado de Alianza entre el Estado de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil (29-V-1851), y la Paz de Octubre de 1851;<sup>8003</sup> y concluyó con la batalla de Caseros (1852).<sup>8004</sup> Pero pocos meses después de Caseros, con la secesión del Estado de Buenos Aires, a raíz de la revolución del 11 de Septiembre,<sup>8005</sup> que rechazó el Acuerdo de San Nicolás,<sup>8006</sup> cundió por todo el espacio de la Confederación Argentina (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) otro nuevo desequilibrio en la balanza del poder político.<sup>8007</sup>

El sistema o conjunto de dicha Confederación estaba constituido por un complejo de cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), cada uno de los cuales contaba a su vez con un equilibrio de poder regional propio, todo ello en el contexto de un sistema subcontinental complejo donde interactuaban también el Imperio del Brasil y las repúblicas del Paraguay y del Uruguay.<sup>8008</sup> Cada una de las provincias de los cuatro subsistemas políticos se debatió en este período ante el dilema de subordinarse a Buenos Aires o a Paraná, Capital de la Confederación. Asimismo, cada una de ellas se dictó su propia Constitución Provincial. Mientras la Convención Constituyente de 1853 facultó al gobierno de la Confederación Argentina para intervenir los gobiernos de provincia "...al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición",<sup>8009</sup> la Convención de 1860, con Buenos Aires reintegrada a la Confederación Argentina,

restringió la facultad de intervenir al único propósito de "...garantizar la forma republicana de gobierno".<sup>8010</sup>

De los actores políticos de entonces, sólo tres de ellos jugaban de árbitros en la balanza del poder político: el Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, el Presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui, y el Gobernador del Estado de Buenos Aires Bartolomé Mitre. Para mediados de 1860, ninguno de dichos tres árbitros estaba en fuerza para volcar la balanza a favor de su propia hegemonía. Cada una de las once provincias restantes más el estado Uruguayo estaban en la posibilidad de optar por cada uno de dichos tres árbitros: por Urquiza, por Derqui o por Mitre. Mientras el Presidente Santiago Derqui solo podía contar como coaligadas a dos provincias cuyanas: San Luis y San Juan, provincia esta última donde había colocado de Interventor a José A. Virasoro;<sup>8011</sup> y Urquiza con las tres provincias del litoral y el gobierno Blanco del Uruguay;<sup>8012</sup> Buenos Aires contaba con Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba.<sup>8013</sup> En este trabajo, analizaremos el sistema de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata --análogamente a como Franke (1968) hizo con las ciudades-estado Italianas del Renacimiento-- como si se tratara de un sistema internacional.

En el subconjunto político Norteño (Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca), el desequilibrio económico y político regional afectó a dichas cinco provincias por igual. A juicio de Prado Robles (1995), el envilecimiento de la moneda boliviana en la década del 50 generó un impacto inflacionario que afectó a todo el norte argentino. Mientras en Salta, el 3 de marzo de 1852, el Coronel Tomás Arias --designado por Bernardo de Irigoyen en representación de Urquiza-- derrocaba al Gobernador José Manuel Saravia; en Tucumán, la Legislatura deponía el 14 de Junio del mismo año al Gobernador Celedonio Gutiérrez, (a) "El Peludo",<sup>8014</sup> designando en su reemplazo al Coronel Manuel Alejandro Espinosa; y en Santiago del Estero los hermanos Manuel y Antonino Taboada,<sup>8015</sup> destituían a su primo segundo el Dr. Mauro Carranza.<sup>8016</sup> Pero en Tucumán, a diferencia de Salta y Santiago, la contrarrevolución logró el 16 de enero de 1853 reponer en el mando a Gutiérrez, coaligado con el Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, derrotando un mes después en el combate de Arroyo del Rey a Espinosa, quien perdió en ello la vida.<sup>8017</sup> Diez meses más tarde, en Octubre de 1853 las tropas Santiagueñas (Taboadistas) derrotaban a la vanguardia de Gutiérrez en el combate de Tacanitas, y otros dos meses después los vencían definitivamente en la batalla de Los Laureles, de resultas de la cual el partido liberal se adueñó del mando designando gobernadores primero al Pbro. José M. del Campo y luego a José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco".<sup>8018</sup>

No obstante esta victoria militar, el partido liberal de Tucumán, el más importante del subsistema político Norteño, cuya hegemonía política era disputada por Paraná y Buenos Aires, entró en un proceso de crisis y faccionalización, debido a los antagonismos provocados por los afanes hegemónicos del Taboadismo Santiagueño, hasta ese entonces coaligado con la Confederación Argentina. A poco de asumir en 1856 la Gobernación de Tucumán el sanjuanino Cnel. Anselmo Rojo,<sup>8019</sup> con la complicidad del liberal Pbro. José María del Campo,<sup>8020</sup> amigo del Gral. Antonino Taboada, se desató una revolución encabezada entre otros por los Posse y los Padilla, muy próximos al Liberalismo Porteño.<sup>8021</sup> Esta revuelta fué inmediatamente reprimida por las fuerzas de la Confederación al mando del caudillo Catamarqueño Coronel Octaviano Navarro.<sup>8022</sup> Y en Santiago del Estero, apenas asumió el mando en 1859 Pedro R. Alcorta,<sup>8023</sup> por diferencias políticas respecto a la lealtad debida a la Confederación Argentina, el partido Liberal

encabezado por los hermanos Taboada boicoteó su gobierno. Debido a este boicot la Legislatura presidida por el Taboadista Pedro C. Gallo,<sup>8024</sup> resolvió destituir a Alcorta, provocando con ello la intervención federal del Dr. Salustiano Zavalía,<sup>8025</sup> enviada por el Presidente Derqui.<sup>8026</sup> Meses más tarde, el Gobernador de Tucumán Salustiano Zavalía, incapaz por sí solo de derrotar a los Taboada, resuelve incrementar su correlación de fuerzas coaligándose con el Coronel Octaviano Navarro --en la llamada Conferencia de Albigasta-- de lo que resulta la formación de un contingente para invadir Santiago del Estero.<sup>8027</sup> Este acuerdo, firmado a espaldas del pueblo Tucumano, hizo que el 31 de Agosto de 1861, el Gobernador Zavalía, fuera destituido por una revolución popular encabezada por Amadeo Alurralde, dirigida por el propio Pbro. Campo y alentada por Próspero García,<sup>8028</sup> (a) "Flor de Manzanillo".<sup>8029</sup> Esta revolución fué sangrientamente aplastada por las tropas de la Confederación en la batalla de Los Manantiales (4-X-1861). Dicho triunfo fue en vano pues apenas advertidos de los resultados de la batalla de Pavón (1862), sus tropas se desmovilizaron hostigadas por las milicias Santiagueñas al mando de Antonino Taboada, de forma tal que el poder del subconjunto político Norteño fué recuperado para el Liberalismo: en Tucumán por el Cura Campo seguido por Arsenio Granillo y José Posse, y en Santiago del Estero por Manuel Taboada.<sup>8030</sup>

## **V-II Las reminiscencias de la política colonial.**

En Córdoba, perteneciente al subsistema político Central, el árbitro político axial de la república, por cuya supremacía política competían Buenos Aires y Paraná, apenas caído el caudillo federal Manuel López, (a) "Quebracho", como consecuencia de Caseros, las fuerzas políticas que acompañaron a Alejo del Carmen Guzmán se dividieron en dos claras tendencias opuestas, la una netamente federal, conocida como de los Rusos,<sup>8031</sup> coaligada con la Confederación Argentina con sede en Paraná;<sup>8032</sup> y la otra liberal, coaligada en tres clubes políticos distintos encabezados por Justiniano Posse, los hermanos Pizarro, y los hermanos de la Peña.<sup>8033</sup> Al exponer el Liberalismo la cuestión religiosa en el seno de la Convención Constituyente reunida en Paraná, el clero se conmovió y dividió entre aquellos que estuvieron a favor de la Constitución tal como fue aprobada y aquellos otros que se negaron a jurar por ella.<sup>8034</sup>

Habiendo triunfado electoralmente Roque Ferreyra, las elecciones que eligieron a su sucesor se polarizaron entre una coalición formada por el Ministro del Interior de la Confederación Santiago Derqui, apoyado por el partido Ruso, el Gobernador Urquiza y el ex-Gobernador Guzmán, por un lado; y Mariano Fragueiro,<sup>8035</sup> apoyado por Ferreyra y el partido Liberal por el otro. Una vez triunfante Fragueiro, para licuar el déficit fiscal se acudió a la venta de tierra pública instrumentando la Ley Agraria del 20 de Noviembre de 1858.<sup>8036</sup> Pero el ahora Presidente Derqui no permitió que su ambicioso plan de obras continuara pues le inició una campaña de desprestigio que culminó con el atentado personal, la violenta sustitución de Fragueiro por Félix de la Peña,<sup>8037</sup> y la firma del decreto de intervención.<sup>8038</sup>

Las desinteligencias entre el ahora Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, jefe del subconjunto político del Litoral, y el Presidente de la Confederación Derqui debilitaron su correlación de fuerzas vis à vis el gobierno de Buenos Aires.<sup>8039</sup> Por su lado, la minoría Liberal en el Gobierno del Estado de Buenos Aires, dirigida por Mitre, pujaba por un doble propósito: a) extender o difundir a las demás provincias un régimen de instituciones y

principios liberales; y b) impedir la transformación de la provincia de Buenos Aires en nación independiente.<sup>8040</sup>

Finalmente, merced a Pavón (1862), el Coronel Manuel Olascoaga pudo remover al Gobernador de Córdoba designado por Derqui: Fernando Félix de Allende,<sup>8041</sup> y a los nombrados por la Legislatura Derquista: José Severo de Olmos,<sup>8042</sup> y Tristán Achával Ezcurra.<sup>8043</sup> Y el Club Libertad pudo finalmente designar como Gobernador de Córdoba a José Alejo Román.<sup>8044</sup> En Córdoba, en dicho período, a juzgar por una tardía carta de Juárez Celman dirigida a Roca en 1878, en el Partido Constitucional de Córdoba, llamado de los Rusos, hegemonizaba el clan de la familia Achával,<sup>8045</sup> dirigido por Pío Achával Iramain,<sup>8046</sup> el cual habría sucumbido "...para siempre como entidad política con el famoso Gobierno de don Pío [1862]".<sup>8047</sup> En Córdoba, en 1853, con motivo del decreto de creación del Tribunal de Apelaciones, se estableció la incompatibilidad entre las funciones inherentes a los Poderes Ejecutivo y Judicial.<sup>8048</sup> En 1856 y 1857, un par de proyectos de leyes de incompatibilidad de aquellos ministros y empleados del Poder Ejecutivo Nacional con cargos de Diputado o Senador, reglamentarios de los entonces artículos 61 y 88 de la Constitución Nacional,<sup>8049</sup> elevados por los Diputados Nacionales por La Rioja José Olegario Gordillo y por Tucumán Filemón Posse Bores, dieron origen a las Leyes 60 y 138.<sup>8050</sup>

En cuanto a Mendoza --perteneciente al subsistema político de Cuyo, y donde el predominio político era disputado por Córdoba y Buenos Aires-- tuvo un trajinar más pacífico que sus otros dos vecinos: San Juan y San Luis. Con Caseros, el Gobernador Alejo Mallea se vio precisado a renunciar para ser reemplazado por el Gral. Pedro Pascual Segura,<sup>8051</sup> a quien lo sucedió a su vez Juan Cornelio Moyano.<sup>8052</sup> Cuando faltaban meses para completar su mandato, en Febrero de 1859, se suscitó un entredicho entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo acerca de la forma correcta de computar la extensión del mandato gubernativo. Al fallecer Moyano, la Legislatura eligió como sucesor al liberal Federico Maza Moyano,<sup>8053</sup> quien tuvo que hacer frente a la infructuosa rebelión de Laureano Nazar,<sup>8054</sup> el sobrino del Fraile Aldao.<sup>8055</sup> Esta cuestionada elección fue declarada nula por la intervención arbitral del Gral. Pedro Pascual Echagüe, enviado por el gobierno de la Confederación, quien a su vez designó como Gobernador Interino a León Correas.<sup>8056</sup> En esta oportunidad, al morir Correas, la Legislatura no eligió como sucesor a un liberal, sino que optó por el mismo Gral. Nazar.<sup>8057</sup> Pero producido el terremoto que destruyó a Mendoza, por presión del Cnel. Juan de Dios Videla Moyano,<sup>8058</sup> la Legislatura debió deponer a Nazar bajo el severo cargo de haber abandonado la ciudad en medio del pillaje.<sup>8059</sup>

En cuanto a San Juan, correspondiente al subsistema político de Cuyo, y donde la hegemonía política era también disputada entre Paraná y Buenos Aires, aunque mediatizada por la oscilante intermediación de Mendoza y Córdoba, se asemejaba al caso de Tucumán. Esta semejanza obedecía a que su caudillo Nazario Benavídez,<sup>8060</sup> partidario ahora de Urquiza y la Confederación Argentina, fue --como el del Gobernador de Tucumán Celedonio Gutiérrez, (a) "El Peludo"-- un jefe ignorante y vitalicio pero al decir de algunos autores manso y benefactor.<sup>8061</sup> Benavídez no solo no fue desplazado del poder --como Gutiérrez en Tucumán-- sino que alcanzó a desempeñarse en dos oportunidades más a lo largo de la década del 50, aunque en medio de un caos digno de Macondo.<sup>8062</sup> En esta agitada década, Benavídez fue primero destituido e intervenido por los partidarios del Club Libertad, muy próximos al Liberalismo Porteño, representados por Zacarías A. Yanzi.<sup>8063</sup> Fracasado Yanzi, Sarmiento desde Chile propuso como transacción una nómina

de notables.<sup>8064</sup> Pero al reasumir Benavídez el mando y arrestar a Yanzi y a Guillermo Rawson, sufrió el 13-XI-1852 el golpe de estado del Cnel. Santiago Albarracín.<sup>8065</sup> Alejado transitoriamente Benavídez, asumió el Gobierno su Delegado Francisco D. Díaz,<sup>8066</sup> vinculado al Liberalismo, quien padeció con su Ministro José Antonio Durán un severo conflicto con el Provisor Eclesiástico Timoteo Maradona, por los diezmos y las capellanías. Por este motivo, el 17 de Marzo de 1857 Díaz fue depuesto por una revolución apoyada por Benavídez, que dió lugar a la intervención federal de Nicanor Molinas, enviado desde Paraná, el mismo que promulgó la primer Constitución provincial de San Juan en Abril de 1856.<sup>8067</sup> Designado Benavídez Comandante de la División del Oeste por el gobierno de la Confederación entró en colisión con el nuevo Gobernador Manuel José Gómez,<sup>8068</sup> acerca de las facultades para nombrar oficiales de la Guardia Nacional.<sup>8069</sup> En el momento en que la candidatura presidencial de la Confederación Argentina era disputada entre Salvador María del Carril (San Juan) y Santiago Derqui (Córdoba), y en que del seno del Club Libertad se desgajaba el Club del Pueblo,<sup>8070</sup> se produjo el asesinato del para entonces ex-Gobernador de San Juan Gral. Benavídez.<sup>8071</sup> El crimen de Benavídez encontraba su antecedente más próximo en la muerte del Gral. César Díaz, acontecida el año anterior (1858) en el Uruguay, en la denominada Hecatombe de Quinteros, y sus precedentes más lejanos en las muertes de los Gobernadores de Salta Pablo Latorre (1835), de Corrientes Genaro Berón de Astrada (1837), de Santa Fé Domingo Cullen (1839), de La Rioja Gral. Tomás Brizuela (1841), de Catamarca José Cubas (1841) y de Tucumán Alejandro Heredia y Marco Avellaneda (1840), del Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza (1840) y del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba).

Con motivo de estos crímenes y a propósito de sus orígenes y autorías, se desataron intensas polémicas entre la prensa de Paraná, la de Buenos Aires y la de Montevideo.<sup>8072</sup> La derivación más inmediata del hecho ocurrido en San Juan fue la caída del primer gobierno de Manuel Gómez, y la asunción del Interventor José A. Virasoro.<sup>8073</sup> La muerte de Benavídez a manos de seguidores del partido liberal de San Juan perjudicó la candidatura presidencial de del Carril y consagró a Derqui como Presidente de la Confederación.<sup>8074</sup> Luego de arrestar y someter a juicio a Gómez y a Saturnino Laspiur,<sup>8075</sup> la Sala de Representantes confirmó la elección de Virasoro.<sup>8076</sup> Pero reelecto Virasoro, al expulsarse a los Diputados de la Legislatura y al rechazar la Convención Reformadora de Santa Fé la diputación sanjuanina, integrada por los liberales Federico de la Barra y Manuel José Zavalla, se generalizó en San Juan nuevamente la violencia.<sup>8077</sup> En este caldo se gestó en Noviembre de 1860 un golpe de estado, seguido del asesinato de Virasoro.<sup>8078</sup> Este segundo crimen político que parecía obedecer a una suerte de sugestión mimética abrió una brecha entre Derqui y Buenos Aires y ayudó a Derqui a cerrar filas con el gobierno de Entre Ríos.<sup>8079</sup> Al día siguiente se eligió Gobernador Interino a Francisco Coll,<sup>8080</sup> nombrando como Ministros a Antonino Aberastain,<sup>8081</sup> y a Valentín Videla.<sup>8082</sup> Decretada la intervención por el Presidente Derqui, éste designó al puntano Cnel. Juan Saa como Comisionado, quien el 11-I-1861 derrotó y permitió que la venganza se cobrara la vida del Gobernador Antonino Aberastain, macabro rito practicado en la llamada Segunda Rinconada del Pocito.<sup>8083</sup> Pero es recién merced a la derrota que sufre la Confederación en Pavón (1862), que son depuestos los Coroneles Juan Saa y Filomeno Valenzuela y el Gobernador Francisco D. Díaz,<sup>8084</sup> y que el Club del Pueblo pudo nombrar como Gobernadores de San Juan, primero a Ruperto Godoy,<sup>8085</sup> luego a Domingo F. Sarmiento, y por último a Manuel J. Zavalla Merlo.<sup>8086</sup>

Con referencia a Corrientes, correspondiente al subconjunto político del Litoral, cuya supremacía política era también disputada por Paraná y Buenos Aires, sus autoridades estaban amenazadas por la sedición del Coronel Nicanor Cáceres, (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado).<sup>8087</sup> Debido a ello el Presidente Urquiza, que fue su aliado y protector en muchas oportunidades, intervino la provincia mediante un decreto refrendado por el Ministro del Interior José Benjamín Gorostiaga.<sup>8088</sup> Y en Santa Fé, también perteneciente al subconjunto político del Litoral, y por cuya hegemonía política también competían Buenos Aires y Paraná, las fuerzas políticas se dividieron en dos claras tendencias geográficamente segmentadas, la una netamente federal, conocida como de los Lopiztas, encabezada por Juan Pablo López, medio hermano del Brigadier General Estanislao López, con asiento en la ciudad de Santa Fé, y subordinada al gobierno de Paraná; y la otra liberal, nucleada en el Club del Pueblo, denominada Cullista, dirigida por José María Cullen,<sup>8089</sup> con sede en la ciudad de Rosario, y políticamente subordinada a Buenos Aires.<sup>8090</sup> Recién merced a la derrota que sufrió la Confederación en Pavón, la supremacía de Buenos Aires se hizo indiscutible, los Gobernadores Pascual Rosas y Mariano Comas fueron removidos y el Club del Pueblo pudo designar como Gobernadores de Santa Fé a Patricio Cullen,<sup>8091</sup> y a José María Echagüe.<sup>8092</sup> El clan de los Aldao y los Candiotti, que había hegemonizado la provincia en el período colonial borbónico, fué sustituido durante el Rosismo, a partir del liderazgo del Brigadier Estanislao López, por un clan de mayor envergadura social y política, el de los Rodríguez del Fresno, al cual pertenecía la mujer del Brigadier. La familia de los Rodríguez del Fresno se hallaba estrechamente relacionada con la de los Freyre, los Iturraspe, los Gálvez, los Iriondo, los Crespo, los Comas, los Aldao y los Cullen, al extremo de celebrar múltiples casamientos entre primos hermanos, de los cuales procedieron un ingente número de primos dobles (paralelos y cruzados).<sup>8093</sup>

En esta etapa que se inició en Caseros y concluyó en Pavón, los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, alcanzando su paroxismo en San Juan, y al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a favor del partido Liberal logró finalmente la Unidad Nacional bajo la hegemonía liberal porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le habían sido ajenas. Las sucesivas fracturas políticas ocurridas en la transición desde la tercer contraola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola progresiva (1852-1880), que transcurrieron entre 1852 y 1862, se correlacionaron positivamente con la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta transición la amenaza social que significó la presencia de las élites y las masas rurales de las provincias interiores, incluida la República Oriental del Uruguay, fue equilibrada o neutralizada mediante compromisos o acuerdos (Paz de Octubre de 1851, Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y Constituciones Nacional y Provinciales).

### Capítulo III-F-23      **Rol piamontés del enclave nacionalista porteño.**

#### Índice

- W-I.    Mitrismo en las provincias y rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-1866).
- W-II.   Hegemonización de un proyecto nacional.

- W-III Fracturas del caudillismo, del militarismo y del clericalismo.
- W-IV Debates acerca de la forma de gobierno.
- W-V Ingerencia del ejército en la política provincial. El caso de Salta.
- W-VI Simulacro de golpe de estado.
- W-VII El caso de Cuyo.
- W-VIII Sujeción de unas provincias a otras. El caso de Catamarca en su subordinación a Tucumán y Santiago del Estero.
- W-IX Subordinación de unas provincias a otras. Los casos de Santa Fé y de Corrientes en su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires.
- W-X Clanes políticos en Córdoba y La Rioja.

## **W-I El Mitrismo en las provincias y el rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-1866).**

Con la ruptura y debacle de la coalición Confederada (1861), donde subsistían fracciones de elites provinciales ideológicamente impregnadas del pensamiento de la modernidad colonial-absolutista; donde el caudillismo, el militarismo y el poder autocrático, eclesiástico y político-patrimonial apenas si fueron afectados con la caída de la restauración absolutista (Rosismo);<sup>8094</sup> y luego de un breve interregno secesionista (1853-1860),<sup>8095</sup> tuvo lugar una transición política marcada por duras luchas intestinas y nuevas coaliciones donde la supremacía vino a ser disputada por:

- 1) la intelectualidad liberal y las logias masónicas (Rectores de Colegios Nacionales, curas liberales, jueces Federales, gerentes de bancos y corresponsales de diarios de la Capital);<sup>8096</sup>
- 2) una elite política (parlamentaria) fragmentada en un clivaje horizontal (facciones rivales), que pensaba la política en espacios más extensos que el regionalismo provincial (clivaje vertical), y que por su misma rivalidad y capacidad de acordar y contraer coaliciones y participar de intervenciones federales a las provincias condicionaba, limitaba o reducía la existencia de prácticas deliberativas, nepóticas y clientelísticas notabiliarias;<sup>8097</sup>
- 3) una nueva elite intelectual (cultural, educativa, periodística y artística), inspirada en el Romanticismo (Michelet, Thierry, Carlyle, Chateaubriand, Herder) y en la recepción del ritual y la estética Verdiana;<sup>8098</sup>
- y 4) una nueva burocracia militar, política, educativa, judicial y financiera, que amplió el número y la calidad de los incentivos selectivos ofrecidos a los clanes familiares locales.<sup>8099</sup>

A diferencia de lo repetido por la Nueva Escuela Histórica, la etapa conocida con el apelativo de Organización Nacional (1862-1880) no fue un proceso lineal, homogéneo y pacífico, sino que por lo contrario, fue contradictorio, heterogéneo y violento. La elite liberal porteña, que podría ser caracterizada como una clase dirigente o proto-burguesía -- comparable al rol que desempeñó la elite Piamontesa en la unificación Italiana, o la Prusiana en la unificación Alemana-- tuvo a diferencia de gran parte de las elites de América Latina, que sólo jugaron un rol de clase dominante, la voluntad de hegemonizar un proyecto nacional, es decir, de elevar sus intereses particulares y regionales a una

categoría general, coaligando subordinadamente los intereses de otras regiones, clases y clanes a su proyecto.<sup>8100</sup> Como parte de un innovador programa político se propuso afirmar una identidad cultural nacional propia, para lo cual fue imponiendo un control simbólico-ritual (cancionero y calendario de efemérides nacionales), una poesía épica fundacional (Santos Vega, Martín Fierro), un arte plástico nacional y moderno (Blanes, Della Valle), una historiografía nacional positivista (fundada en documentación y archivos), y una política secularizadora (laica).<sup>8101</sup>

Haciendo hincapié en la dominación política del aparato estatal, tanto Noble (1960) como Grondona (1967) descubrieron que con anterioridad a la federalización de Buenos Aires y a la llamada Conquista del Desierto (1880), es decir en tiempos en que hegemonizaba la política argentina el Liberalismo Nacionalista Mitrista, existió un tipo de estado embrionariamente oligárquico donde las virtudes cívicas o republicanas, como en la primera ola de Huntington (1991), aún no se hallaban corrompidas.<sup>8102</sup> Sin embargo, la romantización del pasado, que las melancólicas tesis de Noble y de Grondona revelan, dejan sin respuesta numerosas incógnitas, pues aún en ese período, en que se rompe con la primer crisis de la modernidad, una contra-ola regresiva (Rosismo), se perpetuaron los puntos de contacto con la modernidad colonial-absolutista y se dieron faccionalismos inter-regionales y desajustes, desviaciones o involuciones del orden republicano de gobierno (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas).<sup>8103</sup> En ese sentido, para Rusk (1970) y Converse (1972) las propiedades jurídico-institucionales de los sistemas electorales (inscripción o registro, padrones, sistemas de votación, requisitos del sufragio, etc.) tuvieron necesariamente importantes efectos en los comportamientos político-electorales.<sup>8104</sup>

Para una lectura institucionalista (u Olsoniana), reflejada en la tesis de Walt (1987), acerca de la capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de la fuerza o debilidad de los partidos políticos, formulada por Sartori (1992) --que mide su indispensabilidad y/o capacidad de intimidación, afiliación y movilización-- cuanto mayor era la fuerza o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.<sup>8105</sup> Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las amenazas que enfrentaban. A medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por mano propia disuadir o derrotar las amenazas crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza de un partido, su valor como aliado o disuasivo declinaba, incitándolo a someterse a la formalización de coaliciones.<sup>8106</sup>

## **W-II La hegemonización de un proyecto nacional.**

En la hegemonización de un proyecto político, fundado en el mito liberal o idea-fuerza de la unidad nacional, las oligarquías centrales lograron integrar al país.<sup>8107</sup> Aún más, lograron exportar su política liberal a todo el espacio geográfico del llamado Cono Sur, pues no fueron ajenos a esta política,<sup>8108</sup> la lenta transición operada en dicho subsistema internacional, que llevó a: a) a una intervención exterior y a una guerra;<sup>8109</sup> b) a la llamada Cruzada Libertadora (dirigida en 1864 desde Buenos Aires hacia el Uruguay por el Gral. Venancio Flores);<sup>8110</sup> c) a la derrota del Paraguay en la Segunda Guerra de la Triple Alianza;<sup>8111</sup> y d) a la denominada Conquista del Desierto.<sup>8112</sup> En esa subordinación, fruto de una suerte de efecto dominó, las elites oligárquico-liberales se propusieron, por un lado, producir una crisis orgánica en el viejo orden social vigente en las provincias, que se

resistían a ceder el monopolio de la violencia a manos de un ejército nacional, y se obstinaban en la sujeción de la justicia y las legislaturas; así como a neutralizar a los subsistemas políticos marginales y a las clases medias mediante compromisos, concesiones y reformas. Por otro lado, estas elites se propusieron excluir a las masas rurales del interior y las clases trabajadoras urbanas de la vida política, mediante la penetración territorial armada, el patriarcalismo, el padrinazgo, el nepotismo, el clientelismo, el fraude y la proscripción. Por el contrario, en la gran mayoría de los países de América Latina operó en el siglo XIX una división ideológica y geográfica que minó profundamente la posibilidad de unir consensuadamente a sus elites oligárquicas.<sup>8113</sup>

La violación de la Constitución de 1853 y su reforma de 1860, que dieron lugar a la batalla de Pavón (1862), fueron la materia prima que nutrió la investigación histórica acerca de las rupturas o transiciones políticas violentas (golpes de estado) y nos llevaron a formular los siguientes interrogantes. La politización de las fracturas (religiosas, regionales, estamentales, corporativas y etno-lingüísticas) heredadas de la modernidad colonial-absolutista habrían sido amortiguadas por la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno (parlamentarismo, independencia de la justicia, educación laica). La estructura discursiva de las instituciones sociales de la Modernidad estuvo encarnada en una multiplicidad de valores, tales como los principios o códigos de la separación del estado de la sociedad civil, la adquisibilidad de virtudes individuales (patriotismo, laboriosidad, urbanidad, educación, racionalidad, caballerosidad, afán de lucro, prosperidad, etc.), la universalidad de los derechos ciudadanos y las garantías individuales (peticionar, publicar, poseer, enseñar, aprender, sufragar, etc.), la divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad y elegibilidad de los jueces, la incredulidad anticlerical, la representatividad de la democracia, la republicanidad y autodeterminación de los gobiernos provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos ejecutivos, judiciales y legislativos, la igualdad ante la ley, la impersonalidad de las leyes, la fidelidad en los contratos, la privacidad de la propiedad y la ganancia, la convertibilidad del valor de uso en valor de cambio, la laboriosidad industrial, la solidaridad de clase, la periodicidad de los cargos ejecutivos y legislativos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad y privacidad individuales, la nacionalidad del ejército y la iglesia (Patronato), la escolaridad obligatoria y la autonomía de las universidades.

En consecuencia, la diversidad de la transición de los ordenes absolutista y carismático (caudillista) al orden republicano y sus procesos de ciudadanización y laicización, habrían obedecido a la resistencia diferencial de las estructuras socio-demográficas, políticas, económicas y culturales locales.<sup>8114</sup> La batalla de Pavón (1862) habría tenido efectos de mostración o dominó en la llamada Cruzada Libertadora (Uruguay, 1864), en la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70), y en la represión a las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del Lopizmo en Santa Fé, levantado contra el gobierno laicista de Nicasio Oroño (1867), y de López Jordán en Entre Ríos (1870, 1873 y 1876). Pero mientras algunas provincias avanzaron a formas republicanas de gobierno, otras que ya lo estaban revirtieron luego de Pavón a formas carismáticas o caudillescas, que se expresaron en las rupturas y crisis políticas provinciales, tales como la de Salta en 1864; Catamarca en 1862 y 1863; Tucumán en 1861 y 1868; Córdoba en 1863 y 1864; Mendoza, en 1863; Santa Fé en 1867; y Corrientes en 1868 (Cuadro I).

### **W-III Las Fracturas del Caudillismo, el Militarismo y el Clericalismo.**

Entre los antecedentes históricos violatorios del orden republicano de gobierno que acapararon la mayor parte del interés de juristas, publicistas e historiadores sin duda las fracturas provocadas por el caudillismo o legitimidad carismática (Rosas, Yrigoyen, Perón),<sup>8115</sup> el militarismo,<sup>8116</sup> y el clericalismo, herencias de la anarquía o metanastasis que siguió a la Revolución de Independencia, llevaron las preferencias por sobre las supervivencias de la modernidad colonial-absolutista, expresadas en las fracturas genéticas (estamentales o señoriales, etno-lingüísticas, geográficas, patrimoniales, corporativas).<sup>8117</sup> En efecto, las revoluciones de Mayo (1810), Caseros (1852) y Pavón (1862) y las sucesivas revoluciones acontecidas en los siglos XIX y XX,<sup>8118</sup> monopolizaron el interés de las Legislaturas, las Convenciones Constituyentes, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, y las tesis de nuestros historiadores.<sup>8119</sup> Con referencia a las derivaciones jurídicas y constitucionales de la Revolución de Mayo, el Diputado Bartolomé Mitre manifestaba en 1854, al oponerse tanto a la Confederación Argentina como a la independencia absoluta del Estado de Buenos Aires, que

"...el pacto social de esta nación, el derecho, la ley preexistente que debe servirnos de norma, se halla aquí, en este recinto. Allí está: es el acta inmortal de nuestra independencia, firmada en Tucumán el 9 de Julio de 1816".<sup>8120</sup>

Y con respecto al shock político o sustitución de fracturas que significó la batalla de Pavón, que marcaba el fin de un antiguo clivaje pre-moderno de naturaleza geográfica (Buenos Aires y la Confederación) y el comienzo de una nueva fractura moderna de naturaleza ideológica (Liberalismo versus Autonomismo), se debe destacar el hecho de que el Gobernador Mitre se hiciera cargo del Poder Ejecutivo Nacional sólo por medio de un decreto. Dicho decreto invocaba la delegación de poderes

"...a efecto de convocar e instalar el Congreso Nacional y de ejercer, hasta tanto que dicho Congreso resuelva lo que corresponda, las atribuciones anexas a ese cargo".<sup>8121</sup>

Realizadas en cada provincia las elecciones pertinentes, y reunido el Colegio Electoral, consagró como Presidente a Mitre y como Vicepresidente al Coronel Marcos Paz.<sup>8122</sup> Las resoluciones dictadas por Mitre durante su interinato presidencial de facto fueron convalidadas en 1865 por un fallo o acordada de la Corte Suprema que sentó jurisprudencia.<sup>8123</sup>

Y casi treinta años después del célebre discurso de Mitre, el jurista y afamado periodista y duelista Nicolás A. Calvo, en una ignorada carta dirigida al Presidente Roca,<sup>8124</sup> refiriéndose a los pactos preexistentes firmados por caudillos provinciales, que se habían dado como fuente del poder constituyente, le manifestaba:

"...El primer error de nuestros constituyentes fue el dar por origen y fuente de sus poderes de gobierno los pactos preexistentes [Pilar, 1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 1852; etc.], en vez de tomar como los EEUU, la única pura, perentoria, categórica y segura: la voluntad del pueblo".<sup>8125</sup>

Compare los dos proemios de las Constituciones de ambos países, le pedía Calvo a Roca. Aquellos pactos interprovinciales,

"...caducaron con la vigencia de la Constitución Nacional, de hecho; porque ella los derogaba, cerrando el período de la anarquía, y completando la evolución grandiosa, que la disidencia de Buenos Aires puso en peligro, durante diez años; en que tuve el honor y la gloria de luchar, solo al principio [en el Senado de la Confederación Argentina], y acompañado después, por la opinión pública de mi Provincia y de la República, en favor de la unidad y de la integridad nacional, que ha sido y es, la idea fija y perenne de mi vida".<sup>8126</sup>

#### **W-IV Los debates acerca de la forma de gobierno.**

La forma representativa, republicana y federal de gobierno, de que habla nuestra Constitución, vis à vis la forma monárquico-absolutista, en su analogía con la tiranía y el caudillismo, también acaparó el centro de muchas discusiones parlamentarias, periodísticas y jurídicas de esa época fundacional. El Senador bonaerense Aristóbulo del Valle,<sup>8127</sup> sostenía que la forma republicana de gobierno se trataba de

"...aquella que reposa en la soberanía del pueblo, se constituye bajo el sistema representativo, con poderes limitados, llamados a desempeñar funciones determinadas: un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y también un poder electoral".<sup>8128</sup>

Y a juicio del Diputado Delfín Gallo, la forma republicana de gobierno de que habla la Constitución,

"...no está puesta únicamente en contraposición a la forma monárquica, es otra cosa, quiere decir: --el gobierno del pueblo; y mientras el pueblo no pueda gobernarse por medio de los mandatarios que su Constitución establece, la forma republicana de gobierno no existe en una provincia".<sup>8129</sup>

Pero la noción de soberanía popular, como opuesta a la soberanía del monarca, en que estaba fundado el orden representativo, republicano y federal de gobierno exigió en esa época una previa discusión acerca de los elementos constitutivos y las propiedades de la matriz social y política. Entre dichos elementos figuraban los orígenes históricos de la nación y las provincias, quién precedió histórica y cronológicamente a quién, las reglas vigentes en el sistema político y social (Constituciones y regímenes de sanciones individuales y colectivas), los actores individuales y colectivos de la esfera pública y los contenidos de la noción de nacionalidad. La noción de nación estaba fundada en el principio de la soberanía popular. Pero ninguno de los elementos componentes de la noción de nación fue estático, pues han variado y varían con el devenir de la historia. Las fracturas étnicas, lingüísticas, religiosas, corporativas, patrimoniales, y geográficas o regionales, producidas en la base del conflicto político organizado, han variado con la distinta estructura social que rigió diferentes épocas.<sup>8130</sup>

Aparentemente, de 1859 a 1863 el Río de la Plata volvió a experimentar una lucha política, que se extendió al plano militar, en las batallas de Cepeda y Pavón. Pero las resistencias provocadas por Pavón generaron en las situaciones provinciales un desequilibrio de la balanza del poder, que entre 1863 y 1866 dieron lugar a una suerte de efecto dominó. A título de "Jefe de los pueblos en armas" el gobierno de Mitre depuso todos los gobiernos provinciales de los cuatro subsistemas políticos (Norte, Cuyo, Centro y

Litoral) en que estaba fragmentado el efímero sistema nacional de la Confederación Argentina, con excepción del de Entre Ríos, donde al Gral. Urquiza --probablemente debido a la existencia de un pacto tácito, secreto o implícito-- se le reconoció la permanencia en el cargo.<sup>8131</sup>

## **W-V La ingerencia del ejército en la política provincial. El caso de Salta.**

En Salta, perteneciente al subconjunto político Norteño, una vez derrocadas las facciones federales o Derquistas, el partido liberal depuso al Gobernador José María Todd,<sup>8132</sup> y nombró interinamente al Gral. Anselmo Rojo,<sup>8133</sup> y en Mayo de 1862 eligió como Gobernador propietario a Juan Nepomuceno Uriburu,<sup>8134</sup> apoyado en forma enérgica, desde Tucumán por el clan de los Posse, y desde Santiago del Estero, por los hermanos Taboada.<sup>8135</sup> Aprovechándose de la victoria de Pavón el clan familiar de los Uriburu,<sup>8136</sup> alcanzó "...el monopolio de la función pública asegurando una renta de \$20.000 anuales a hermanos, primos, y sobrinos".<sup>8137</sup> En la Legislatura estaban como Representantes los primos hermanos José, Francisco y Evaristo Uriburu, y Juan de Navea Uriburu.<sup>8138</sup> Tal fue el grado de nepotismo,<sup>8139</sup> que el entonces Diputado Provincial Isidoro López Plaza,<sup>8140</sup> llegó a la celebridad satirizando al clan gobernante, en escritos en verso y prosa, que se publicaban en el periódico El Libre,<sup>8141</sup> y en el diario La Actualidad.<sup>8142</sup> Pero no eran sólo los Uriburu quienes trataban de imponer los gobiernos de familia, pues la misma táctica fue seguida en Salta más tarde por los Leguizamón, clan que también pertenecía al partido liberal; y más luego primero por los Ortices y después por los Ovejero, pertenecientes al partido autonomista.<sup>8143</sup>

Pero como consecuencia del requisito de la inscripción previa de los sufragantes en un Registro Público Provincial, establecido por la Ley 75, dictada en Noviembre de 1863,<sup>8144</sup> y el desprestigio popular alcanzado por el clan de los Uriburu, Salta padeció, a principios de 1864, el primer golpe militar acontecido después de Pavón, "...contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado esplicitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial".<sup>8145</sup> En efecto, a juzgar por los descargos que luego produjera el Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley Wilde,<sup>8146</sup> la tropa a su mando padecía una agitación política fuera de lo común, instigada por su yerno el Dr. Isidoro López, quien se hallaba "...exaltado como un Republicano de tiempos atrás".<sup>8147</sup> El pueblo, levantado en masa contra el Gobierno de Juan N. Uriburu, principió "...a indicar al 8o. como la base de una revolución: me vivaron cuando pasaba por las calles, y aún no faltaba quien me indicase atrevidamente como Jefe de una conspiración".<sup>8148</sup> El Gobierno de Salta comenzó a manifestar desconfianzas acerca de Wilde "...por la natural relación con López [era su yerno], aunque sabía que era mal sostenida por mi parte".<sup>8149</sup> Por ello, Wilde resolvió --de acuerdo con el Gobierno de Uriburu-- sacar la tropa Tucumana de Salta, entrando el 29 de Febrero a la Capital de Jujuy,

"...con 147 hombres piquetes de la 1a., 2a., y 3a. Compañía [Tucumanos], dejando por orden del Gral. Anselmo Rojo, cincuenta y más hombres [Salteños] de guarnición en Salta a las inmediatas [ordenes] del Cap. D. Napoleón Uriburu, de la confianza por supuesto del Gobierno".<sup>8150</sup>

Quince días más tarde, el 15 de marzo a las tres de la mañana, las tropas acantonadas en Jujuy, en medio de un aguacero semejante a un diluvio, se sublevaron, y a juzgar por los dichos descargos de Wilde,

"...me negó toda obediencia, diciendo que iba a echar a tierra al Gobierno de Salta de acuerdo con el pueblo; y dijo que lo haría de su propia autoridad, supuesto que yo no quería obedecer a su llamamiento. La intentona, el motín se consumó, y temeroso de un saqueo en la Capital [de Jujuy], consentí que dos oficiales los condujeran fuera de la población".<sup>8151</sup>

Como entre los sublevados se encontraban el Subteniente Alfredo Wilde,<sup>8152</sup> y el Teniente Fábregas, oficiales del Batallón 80. de Línea, Pepe Posse, (a) "Dr. Amoníaco", se preguntaba en El Liberal,

"...¿que significa este hecho? ¿creeremos que el hijo se amotinaba contra el padre?. Pero ya sabemos como pensaba el padre en las cuestiones políticas de Salta, y sabemos también que los sublevados querían por la acción lo mismo que su Jefe, luego no hay que hacer esfuerzos de malicia para atribuir el verdadero origen de aquel motín al más interesado en cuestión".<sup>8153</sup>

En el transcurso de la sublevación se cometieron barbaridades que fueron precipitadamente denunciadas por Pepe Posse desde las columnas de El Liberal de Tucumán, pero que después resultaron no ser ciertas, entre ellas "...la fusilación [sic] de nuestro decidido amigo, Cnel. Sergio Corvalán, la del Cap. Borelli y una compañía de estos", cometidas por los caudillos del Campo Santo: Alejandro Figueroa, Vicente Anzoátegui, Ramayo y otros.<sup>8154</sup> La montonera de Chicoana, levantada al mismo tiempo que la rebelión del Batallón 80. de Línea, corroboraba según Posse la naturaleza de los vínculos políticos que tenía la revolución.<sup>8155</sup> Amén de los Salteños, en aquella revuelta participaron los asilados Confederados o Derquistas de diferentes provincias,<sup>8156</sup> y en ella el médico Ezequiel Colombres,<sup>8157</sup>

"...era el alma de las reuniones que se hacían en la capital de Salta, pasando revista y alentando en la oposición a todos los mazorqueros asilados allá de diferentes provincias".<sup>8158</sup>

Merced a la información proveída por el Gobernador de Jujuy, Dr. Daniel Aráoz Tezanos Pintos,<sup>8159</sup> perteneciente a la facción de los Conspicuos, las fuerzas del Gobierno de Salta pudieron batir a las tropas del Batallón 80. de Línea en Los Sauces.<sup>8160</sup> La participación que había tomado el Gefe del Batallón 80. de Línea Coronel Guillermo Wilde,<sup>8161</sup>

"...en las cuestiones políticas internas de la provincia de Salta, faltando a la abstención que le correspondía observar, como Jefe Nacional en servicio activo, o más bien contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado explícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial contra las autoridades legalmente constituidas, que deben sostener lejos de combatir",<sup>8162</sup>

fue juzgada en causa militar, preñada de denuncias y testimonios contradictorios. Según los descargos del Coronel Wilde, expuestos en el Apéndice Sal-I, estos probarían que en realidad el Gral. Rojo manifestó desidia pues no estuvo a la altura de los acontecimientos.

## **W-VI Un simulacro de golpe de estado.**

Pero pese a la derrota militar sufrida en Los Sauces por los restos del Batallón 80. de Línea, supuestamente coaligado a los denominados mazhorqueros o Derquistas,<sup>8163</sup> a todas luces, en opinión del ex-Gobernador Coronel Anselmo Rojo, "...reaccionarios y contra-revolucionarios" (que incluían al liberal disidente Isidoro López),<sup>8164</sup> en las elecciones de Mayo de ese año, el partido Liberal,<sup>8165</sup> y sus prosélitos los Tamayo, los Ugarriza, y los Obejeros, sufrieron una derrota aplastante.<sup>8166</sup> La coalición de facciones triunfante era dirigida por el Presidente de la Legislatura Don Segundo Díaz de Bedoya,<sup>8167</sup> y la integraban Aniceto Latorre,<sup>8168</sup> Pedro José Frías, (a) "Peque",<sup>8169</sup> Martín V. Cornejo,<sup>8170</sup> el Coronel Francisco Centeno,<sup>8171</sup> Alejandro Figueroa,<sup>8172</sup> Solano Cabrera, Damián Torino Santibáñez,<sup>8173</sup> el Teniente Coronel Juan Solá Chavarría,<sup>8174</sup> "...Ramayo, los Algañaraces,<sup>8175</sup> Villagrán, y según se cree también el Gral. Gutiérrez, todos estos colocados en alta graduación de Generales y Coroneles".<sup>8176</sup> Celebradas las elecciones el 4 de Junio, triunfaron en el distrito capitalino Emilio Castro Boedo, Juan Martín Leguizamón y Juan Nepomuceno Solá.<sup>8177</sup> Para impedir el acceso al poder a los triunfadores y a Cleto Aguirre,<sup>8178</sup> la asunción del cargo de Gobernador de Salta, el clan de los Uriburu acudió el 8 de Mayo de 1864 a un simulacro de golpe de estado, donde José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", asumió la Gobernación en reemplazo de su tío Juan.<sup>8179</sup> En un burdo intento por justificar la frustrada maniobra, el Coronel Anselmo Rojo, le informó al General Wenceslao Paunero acampado en Córdoba que

"...aquel hecho fue una necesidad impuesta por la salvación del partido liberal, para evitar la elevación al poder de la mashorca, que en Salta se hallaba reunida con chala y todo".<sup>8180</sup>

Habiendo asumido Cleto Aguirre la Gobernación, Isidoro López fué designado Fiscal especial. Para denunciar la causa a que dio lugar el Movimiento Revolucionario del 8 de Mayo,<sup>8181</sup> Nicolás Careño,<sup>8182</sup> fue designado Juez "...para perseguir los intereses y la familia de Don José Uriburu",<sup>8183</sup> y el Capitán Napoleón Uriburu,<sup>8184</sup> fue detenido por complicidad en dicho Movimiento. Asimismo, el Gobernador Aguirre se enfrentó al Obispo Buenaventura Rizo Patrón a raíz de la inconducta del Pbro. Sixto Sáenz, de Rosario de Lerma.<sup>8185</sup>

## **W-VII El caso de Cuyo.**

En Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, y donde la hegemonía política era disputada por Córdoba y Buenos Aires, como consecuencia de la victoria de Pavón (1862), el partido liberal también ocupó el poder. El Gral. Ignacio Rivas, desprendido del Ejército del Gral. Wenceslao Paunero, con asiento en Córdoba, y acompañado por el Auditor de Guerra Domingo F. Sarmiento, impuso como Gobernador de Mendoza a Luis Molina.<sup>8186</sup> A este le siguió el Gobernador Franklin Villanueva García,<sup>8187</sup> iniciándose con ellos, al decir de Funes (1942-51), la serie de gobiernos de familia que dominarían Mendoza por más de medio siglo.<sup>8188</sup> Sin embargo, esta dominación no transcurrió sin altibajos. A comienzos de 1863, la Legislatura fue violentamente disuelta por orden del Gobernador Molina y su Ministro Eusebio Blanco,<sup>8189</sup> en plena sesión "...por un trozo de tropa cívica y como 200 hombres del populacho que habían sido embriagados al efecto".<sup>8190</sup> La nueva Legislatura digitada por Molina dictó una Ley por la cual los mismos Diputados debían elegir a sus reemplazantes. Y cuando de resultas de dicha Legislatura, Eusebio Blanco fue elegido Senador Nacional, su diploma fue rechazado.<sup>8191</sup>

En San Juan, también perteneciente al subsistema político de Cuyo, Domingo F. Sarmiento asumió el mando, pero al entrar en conflicto con el Ministro del Interior Guillermo Rawson --acerca de la atribución que Sarmiento se tomara de decretar el estado de sitio-- fue elegantemente destinado como Embajador en los Estados Unidos.<sup>8192</sup> El mando es entonces asumido por Santiago Lloveras,<sup>8193</sup> para sucederlo luego Joaquín Quiroga y Saturnino de la Presilla.<sup>8194</sup> Pero este último amaneció muerto en su cama el Domingo 24 de Julio de 1864. El Nacional informaba que desde que Presilla había asumido el mando "...con generalidad se pronosticaba su muerte, fundándose en lo mal querido que era por el pueblo, lo que en San Juan es un presagio terrible".<sup>8195</sup>

#### **W-VIII.- La sujeción de unas provincias a otras. El caso de Catamarca en su subordinación a Tucumán y Santiago del Estero.**

Y en Catamarca, correspondiente al subconjunto político del Norte, y por cuya supremacía política habían competido en el pasado Tucumán y Córdoba, luego de Pavón, el Gobierno Nacional la intervino por decreto derrocando al Gobernador Interino Francisco Ramón Galíndez, sucesor de Miguel Molina,<sup>8196</sup> dando lugar a una elección que consagró como Gobernador al liberal José Luis Lobo.<sup>8197</sup> La lucha por esta provincia obedecía fundamentalmente al número de electores que les correspondía para la elección del Vice-Presidente en el Colegio Electoral, pues la candidatura presidencial de Mitre estaba fuera de cuestión. Los Tucumanos y su Gobernador el Cura José M. del Campo, que sostenían la candidatura a Vice-presidente de Marcos Paz, estaban convencidos de que apoyando a Moisés Omill como Gobernador se aseguraban los diez electores de Catamarca.<sup>8198</sup> Triunfante el Gobierno Nacional en el combate de Sumampa el 10 de agosto de 1862, la Legislatura consagró a Omill como Gobernador Provisorio.<sup>8199</sup> Convocadas las elecciones, ninguno de los dos candidatos, ni Omill que estaba apoyado por los Tucumanos y por el Cura Campo; ni Ramón Rosa Correa,<sup>8200</sup> a quien lo sostenían los Taboada, obtuvieron mayoría absoluta. Pero los partidarios de Correa lo consagraron como triunfador, lo cual provocó el veto del Gobernador Provisorio Omill.<sup>8201</sup> Los diarios de Córdoba atribuyeron el veto de Omill al interés de embrollar y dificultar la situación. En el interín, en la noche del 17 de agosto de 1862, estalló una revolución encabezada por una mujer de filiación liberal, Doña Eulalia Ares de Bildoza,<sup>8202</sup> apoyada por los Taboada, que obligó a Omill a huir a Tucumán,<sup>8203</sup> "...quedando allí don Juan Cano de Gobernador puesto por el motín", hasta el regreso del titular Ramón Rosa Correa.<sup>8204</sup>

Ante tal situación y para disuadir a la oficialidad y la tropa Santiagueña Omill pidió la intervención del Gral. Paunero quién aconsejó a Mitre que interviniera Catamarca.<sup>8205</sup> El Poder Ejecutivo designó entonces al Gral. Anselmo Rojo como Comisionado Nacional. "...¿Y que hace el Comisionado?, declara Gobernador legítimo al señor Correa, sin más antecedente".<sup>8206</sup> Pero Correa no pudo gobernar, pues en Abril de 1863 estalló un grave motín de la soldadesca, la cual saqueó la ciudad quemando el archivo oficial. Correa tuvo que renunciar, delegando el mando en el Comandante Víctor Maubecín,<sup>8207</sup> apoyado por los Taboada, "...que ha sido una tiranía continuada, una violación constante de todas las leyes de la provincia, una de esas tiranías insoportables que no podía menos de traer una revolución".<sup>8208</sup>

## W-IX      **La subordinación de unas provincias a otras. Los casos de Santa Fé y de Corrientes en su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires.**

En Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuyo predominio político era disputado por Concepción del Uruguay, residencia del Gobernador Urquiza, y por Buenos Aires, nueva sede del Gobierno Nacional, al imponerse luego de Pavón el partido liberal, se inauguró una política radicalmente distinta de las precedentes, opuesta a la xenofobia propia del federalismo, pues el reclutamiento de la nueva elite no obedecía ya a los viejos patrones geográficos de nacimiento. En Santa Fé, al decir de un diario cordobés, dirigido por Juan Brandan,

"...sólo la voluntad de fierro del Sr. [Patricio] Cullen y su inteligente Ministro D. José María Zuviría,<sup>8209</sup> han podido sacarla de la miseria a que por esos vampiros había sido reducida y presentarla como modelo de progreso ante sus demás hermanas".<sup>8210</sup>

Por el contrario, la oposición al gobierno de Cullen no era mas que

"...el despecho de esos que a fuerza de adular se hacían de una posición y una renta, la que hoy no pueden tener porque los medios de adquirir que tiene la barbarie y la corrupción no se aceptan bajo la ilustrada administración que hoy tenemos".<sup>8211</sup>

Y en 1864 se llama a elecciones para Gobernador, triunfando con el apoyo de Urquiza y el periódico *El Ferrocarril*, Nicasio Oroño,<sup>8212</sup> contra la candidatura de Pascual Rosas,<sup>8213</sup> apuntalada por el Gral. Ricardo López Jordán.<sup>8214</sup> En Entre Ríos, Urquiza encomendó a Mitre la convocatoria al Congreso Nacional.

En Corrientes, también perteneciente al subsistema político del Litoral, por cuya hegemonía política competían Concepción del Uruguay y Buenos Aires, luego de Pavón, el Gobernador Canónigo Dr. José María Rolón fue derrocado, erigiéndose entonces las sucesivas gobernaciones de los hermanos Pampín, alteradas por la invasión paraguaya que alcanzó a permanecer por más de un año en posesión de la ciudad de Corrientes (ver Cuadro CRR-I). Reinstalado en el poder el Gobernador Manuel Ignacio Lagrña,<sup>8215</sup> por el ejército nacional, al poco tiempo fue sustituido electoralmente por Evaristo López. Este último fue impuesto por el caudillo Gral. Nicanor Cáceres, (a) "Tatú pitá" (Quirquincho Colorado), partidario de Urquiza, sin que la Legislatura fuera integrada hasta mediados de 1867.<sup>8216</sup> Para neutralizar al Cacerismo, la conducción porteña aconsejó fortalecer el imperio del partido liberal.<sup>8217</sup> Desgastado López en su gestión, duramente atacado desde las páginas del diario pro-mitrista *El Nacionalista*, tuvo que hacer frente en Septiembre de 1866 a un motín militar que fue reprimido y se conoció como "la revolución de los porteños".<sup>8218</sup> El Artiguismo y luego el Cacerismo tuvieron su origen en lo que se denominó "el desarreglo de los campos", producto del abuso de las vaquerías durante la administración de las Temporalidades, y de las abrumadoras carneadas de los ejércitos durante las guerras civiles, con la consiguiente despoblación de las estancias. La semilla así sembrada estalló en el oriente correntino (costa del río Uruguay) a mediados del siglo XIX con el denominado Cacerismo.<sup>8219</sup>

## W-X      **Los clanes políticos en Córdoba y La Rioja.**

En Córdoba, concerniente al subconjunto político del Centro, y por cuya supremacía política también rivalizaban Concepción del Uruguay y Buenos Aires, producida Pavón (1862) y la revolución del Coronel Manuel de Olascoaga, el Partido Liberal entró en descomposición. En la lucha librada por la gobernación, entre José Alejo Román,<sup>8220</sup> quien duró en el gobierno sólo seis días, y Félix de la Peña, quien alegó haber sido despojado del cargo injustamente por Derqui, el Gral. Paunero repuso a Peña por breves días, hasta designar como Gobernador Interino al Coronel Marcos Paz.<sup>8221</sup> Convocadas las elecciones en 1862 triunfó Justiniano Posse por sobre Félix de la Peña.<sup>8222</sup> Su administración estuvo jaqueada por la Montonera del Chacho Peñaloza y por las rivalidades de las facciones liberales.<sup>8223</sup> Finalmente, una asonada dirigida por el Comandante Simón Luengo,<sup>8224</sup> y apoyada por el partido Constitucional, cuyos miembros eran conocidos por el apelativo de "Rusos", destituyeron a Posse y designaron a José Pío Achával Iramain, (a) "El Paio", al mando de la Provincia.<sup>8225</sup> A Achával lo confirmó el Gral. Peñaloza cuando invadió la provincia hasta que con motivo de la batalla de Las Playas el Gral. Paunero repuso transitoriamente en el cargo a Posse.<sup>8226</sup> Dos años después, cuando Posse fue ultimado por agentes de la administración,<sup>8227</sup> y el Gobernador de Córdoba solicitó la intervención federal, el Gobierno Nacional prestó por derecho propio la intervención del Gral. Emilio Conesa para disuadir a los revoltosos y garantizar el orden y la tranquilidad pública.<sup>8228</sup>

Y en La Rioja, también perteneciente al subsistema político del Centro, y cuya supremacía política había sido disputada por Córdoba y Santiago del Estero, el clan de los Dávila y los Villafañe se había enseñoreado nuevamente, a partir de Pavón, del poder político (Cuadro LR-I). Pero la irrupción del Chacho Peñaloza,<sup>8229</sup> cuando la ciudad de La Rioja fue militarmente sitiada, en 1862, desplazó a Domingo Antonio Villafañe del poder.<sup>8230</sup> Recién en 1864, con el consentimiento del Batallón No.6 del Ejército de Línea, y de su jefe el Gral. Arredondo, el Coronel Julio Campos fue designado Gobernador.<sup>8231</sup> Para esa época, la Montonera había tomado proporciones alucinantes.<sup>8232</sup> A La Rioja habían ido a parar "...algunos de los sublevados en La Viuda y casi todos los amotinados del 2o contingente de San Juan".<sup>8233</sup> Según las cartas que había recibido Pepe Posse "...la montonera subía ya a cerca de mil hombres muy bien armados".<sup>8234</sup> Lo que a Posse le hacía creer que Campos se sentía débil es que en Septiembre de 1865 "...había despachado su familia a Buenos Aires".<sup>8235</sup> La Montonera estaba apoyada

"...por los Rusos de Córdoba y se cree que por el círculo de D. Roque Ferreyra, de modo que debemos sospechar que todo el partido federal de estos pueblos ha de propender al triunfo de los bárbaros de los Llanos, contando de hacerse allí de una base para futuras conmociones".<sup>8236</sup>

Derrotado militarmente el federalismo Rosista en Caseros (1852), agotada la estrategia Confederada del Urquicismo, y consolidado el poder del Liberalismo Mitrista en todo el territorio argentino a partir de la victoria militar de Pavón (1862) se impuso en el país una etapa donde imperaron estrategias revolucionarias de índole militar y legal combinadas con salidas electorales nacionales y provinciales. En esta oportunidad es cuando la elite porteña tomó conciencia de la necesidad de montar un aparato nacional de disuasión militar y participar del control político de las provincias en combinación con las elites del interior. Pero la incorporación del régimen democrático en nuestra Constitución era sólo una virtualidad, pues las tácticas y las estrategias para burlar la forma representativa de gobierno en lo que vá desde los orígenes del estado nacional fueron

infinitas, incluso dentro de las instituciones democráticas de los gobiernos constitucionales, y dieron lugar a intensas discusiones parlamentarias, periodísticas y epistolares.

En esta segunda etapa de la llamada Organización Nacional que se inició en Pavón (1862) y se interrumpió con San Jacinto (1867), las rupturas políticas y las crisis de sucesión se dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, y secundariamente mediante el fraude electoral, los pactos o negociación inter-notabiliar, o las reivindicaciones religiosas. El agregado de conflictos y rupturas ocurridos fueron un fenómeno contradictorio, pues así como entre ellos hubo un cúmulo de hechos derivados de Pavón que contribuyeron a consolidar un proceso revolucionario burgués de larga duración, hubo otros que lo boicotearon seriamente, al extremo de hacer peligrar su subsistencia. Para que se produjera la ruptura y se superara la crisis de transición, desde la contra-ola regresiva o primer crisis de la modernidad hacia la ola progresiva (unidad nacional, 1852-62):

I) las elites provinciales tomaron conciencia que:

a) era preciso pensar la política en términos de un área más vasta que la provincia;

b) el compromiso con la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era imprescindible para sus respectivas cohesiones internas, al extremo de participar en la elección de los Electores a Presidente de la República y a Senadores Nacionales;<sup>8237</sup>

c) las rupturas políticas absolutistas y violentas (asonadas, golpes de estado, motines militares, crímenes políticos, etc.) debían ser sustituidas por nuevas prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaran las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo, el transformismo, y la división de poderes en el seno de nuevas instituciones;<sup>8238</sup>

y d) que se imponía para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales una lucha política y no un enfrentamiento militar, donde se reprobaba explícitamente la injerencia del ejército en la lucha política, y de las fuerzas armadas de una provincia en los sucesos políticos de otra sin orden del gobierno federal;<sup>8239</sup>

II) la elite nacional o metropolitana tomó conciencia que era preciso:

a) pensar la política en términos de un área más vasta que Buenos Aires y su campaña al extremo de extenderla más allá de las fronteras nacionales;<sup>8240</sup>

b) reconocer a las elites urbanas del interior identidad y representatividad en el aparato burocrático-administrativo de un estado nacional (Colegio Electoral y Senado Nacional) que les permita equilibrar la movilización política de sus grandes masas rurales;

c) domesticar las elites del interior: I) influyendo en la confección de las listas de candidatos legislativos, judiciales y docentes; II) entablando coaliciones con facciones disidentes; y III) haciendo renunciar a los gobernadores desafectos sin necesidad de: 1) intervenir las provincias, 2) infringir los principios republicanos de gobierno, o 3) influir en las elecciones locales;

y d) la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, instrumentando para ello el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones constituyentes),<sup>8241</sup> el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),<sup>8242</sup> la justicia (jueces federales),<sup>8243</sup> la información (corresponsales de la prensa porteña),<sup>8244</sup> las comunicaciones postales y telegráficas;<sup>8245</sup> el ejército

nacional y sus fueros;<sup>8246</sup> la Iglesia y su poder patrimonial;<sup>8247</sup> los clanes familiares (a través del parentesco de las elites); y la caridad (sociedades de beneficencia).<sup>8248</sup>

### Capítulo III-F-24.- *Putsch* en el interior como detonador de la Revolución del 90.

#### Índice

- X-I El Juarismo y las vísperas en el interior argentino (Tucumán, Córdoba y Mendoza).
- X-II. Conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial.
- X-III Destitución por intervención federal. El caso de Santiago del Estero.
- X-IV Destitución por juicio político. El caso de Córdoba.
- X-V Destitución por *putsch* militar. El caso de Tucumán.
- X-VI Resistencia al *putsch*. El caso de Catamarca.
- X-VII Remoción por *putsch* militar. El caso de Mendoza.
- X-VIII.- Cooptación de miembros de las clases subalternas.

#### **X-I El Juarismo y las vísperas en el interior argentino (Tucumán, Córdoba y Mendoza).**

Muchos son los trabajos que en este siglo se han dedicado al análisis del terrorismo de estado.<sup>8249</sup> Pero pocos o ninguno los que se han atrevido a insinuar la existencia de esta mácula en la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, las violaciones terroristas a la Constitución Nacional y a las Constituciones Provinciales fueron el material que nutrió el análisis histórico acerca de las fracturas o desajustes políticos o transiciones por colapso (*putschs* o golpes de estado).

Estas violaciones, ocurridas durante el segundo ciclo del primer período de expansión, registrado por Di Tella y Zymelman entre 1885 y 1892,<sup>8250</sup> nos han llevado a aplicar la variante Hobbessiana de la articulación de racionalidades individuales, de C. H. Acuña (1995),<sup>8251</sup> y a explicar las crisis o conflictividades políticas de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política), de Ross (1995); y a entender la movilización de los sentimientos de identificación, entre ellos las conflictividades internas y externas, por la perspectiva psico-cultural, de Ross (1985, 1995).

Finalmente estas teorías nos han inclinado a formularnos un par de interrogantes a propósito de la conflictividad interna padecida por provincias como Tucumán, Córdoba y Mendoza:

- a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía derivar en golpes de palacio o de estado (*putschs* militares) o revoluciones desde arriba con connotaciones de terrorismo de estado?;

y b) ¿guardaron alguna relación los putschs opositores tolerados por el Presidente Roca, ocurridos en Corrientes (1881), Santiago del Estero (1882 y 1884) y San Juan (1884), y la frustrada competitividad oligárquica de la década del 80 con los exitosos putschs alentados desde el propio poder del estado por el Presidente Juárez Celman, registrados en Tucumán (1887), Córdoba (1888) y Mendoza (1889)?.

## **X-II La conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial.**

La crónica anarquía en las situaciones provinciales, las conflictividades interna y externa manifestadas en el despilfarro de tierras, la especulación inmobiliaria, la emisión descontrolada de moneda en forma de letras de tesorería, la irrupción de nuevos ramales ferroviarios, y la consiguiente expansión del ciclo económico,<sup>8252</sup> alcanzaron también en la década del 80 a gran parte de las provincias del interior Argentino.<sup>8253</sup> A mediados de dicha década la complejidad política y la conflictividad externa, manifestada en la cuestión sucesoria nacional o presidencial, tuvo en vilo a todas las provincias. Este estado de conmoción afectó primero a aquellas provincias que habían votado por Bernardo de Irigoyen o por el candidato de los Partidos Unidos (Tucumán y Santa Fé), y a medida que se acercaba el fin de su mandato, afectó a aquellas otras provincias cuyos gobernadores estaban próximos a Roca en la interna política del PAN.

## **X-III Destitución por intervención federal. El caso de Santiago del Estero.**

En Santiago del Estero las candidaturas para diputados nacionales y la negativa del Gobernador Pedro Firmo Unzaga,<sup>8254</sup> a pronunciarse a favor de la postulación de Miguel Juárez Celman, reverdeció la pasión política, con gran desborde de violencia, que la exponía a un putsch cívico-militar, obligando a una cuarta y última intervención de la provincia a manos del Jefe de Enganches y de la Legislatura.<sup>8255</sup> Unzaga se hallaba al parecer apremiado por el Senador Nacional Absalón Rojas,<sup>8256</sup> por más que este último lo negara.<sup>8257</sup> Suspendido el Gobernador por la Legislatura, constituida esta última en Tribunal de Juicio Político, dominada en sus tres cuartas partes por Absalón Rojas,<sup>8258</sup> y alegándose para la suspensión del cargo su enfermedad, se nombró en su reemplazo en 1884 a Don Sofanor de la Silva,<sup>8259</sup> quien prolongó su mandato hasta Octubre de 1886, sucediéndolo en el cargo ahora sí D. Absalón Rojas.<sup>8260</sup> A instancias de Julio A. Roca, Rojas resultó consagrado Gobernador, seguido en 1889 por su pariente Maximio Ruiz Alvarado.<sup>8261</sup> Concluido su mandato como Gobernador, Rojas volvió al Senado, para volver nuevamente a la gobernación en 1892, aunque inmediatamente frustrada por una insurrección popular seguida por una intervención federal.<sup>8262</sup> Los antiguos vínculos reforzantes (nepóticos) del liberalismo Taboadista encontraron en la década del 80 su contrapartida en la propia actitud del Gobernador autonomista Absalón Rojas. Este último, y su pariente el Senador Nacional Maximio Ruiz, Presidente del Club Libertad, se permutaban entre sí permanentemente los cargos.<sup>8263</sup>

## **X-IV Destitución por juicio político. El caso de Córdoba.**

En Córdoba, provincia sumida en profundas fracturas pre-modernas y modernas, donde la elite dominante se había reorganizado bajo un régimen de vínculos familiares cruzados,<sup>8264</sup> las facciones políticas se hallaban movilizadas simultáneamente por la característica compartida de la religión y la política. El Gobernador Ambrosio Olmos, el más fuerte latifundista del sur de la provincia, y políticamente leal al ex-Presidente Roca,

fue sometido por la Legislatura dominada por el Juarismo a juicio político y destituido.<sup>8265</sup> En su lugar asumió el Vice-Gobernador José Echenique,<sup>8266</sup> quien convocó a elecciones para ser designado Gobernador el caudillo Marcos Juárez, hermano del Presidente,<sup>8267</sup> desistiendo de elegir a Don Felipe Díaz y Gonsález, jefe del clan de Santa Catalina.<sup>8268</sup> Al referirse al poder político de los descendientes del que fuera caudillo Artiguista y Gobernador de Córdoba José Xavier Díaz (Ver Cuadros COR-I y COR-II), Cárcano (1963) cree ver el Clan de Santa Catalina. Por el contrario, Díaz de Molina (1972), niega la existencia de dicho Clan, y afirma equivocadamente que el frustrado candidato a Gobernador de Córdoba en 1877 Don Felipe Díaz y Gonsález, uno de los propietarios de Santa Catalina, si bien fue tío político de los Presidentes Julio Roca y Miguel Juárez Celman, fue adversario político del primero durante toda su vida.<sup>8269</sup>

Más aún, la sociedad cordobesa se encontraría inmersa en intensos vínculos reforzantes, y fracturada por la incidencia de un factor pre-moderno: el parentesco. A juicio de Díaz de Molina (1972), La aplastante mayoría de la aristocracia de las provincias interiores, a diferencia de una minoría oligárquica de filiación roquista, perteneció durante la llamada Organización Nacional (1862-1880) al Partido Liberal Nacionalista, dirigido por Mitre, y posteriormente a la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem.<sup>8270</sup> Sin embargo, la información con que contamos parece confirmar el aserto de Cárcano, pues el denominado Clan de Santa Catalina, produjo tres presidentes [Roca, Juárez Celman, y Figueroa Alcorta], un vicepresidente [Roca (h)], varios gobernadores [Juárez Celman, Gavier Figueroa, Figueroa Alcorta, Roca (h), Frías Díaz Allende], jueces, senadores, y diputados".<sup>8271</sup> El propio Miguel Juárez Celman, cuando Gobernador de la Provincia de Córdoba (1880-82), impuso como su sucesor a su primo hermano político Gregorio Gavier Figueroa,<sup>8272</sup> miembro de la llamada "Liga de Beduínos",<sup>8273</sup> y luego cuando Presidente de la República impuso como Gobernador a su medio hermano Marcos Juárez. Sólo entre los senadores provinciales he podido hallar una decena de miembros de esta familia.<sup>8274</sup> A ello podríamos agregar, que dicho Clan también produjo su propia oposición pues en 1886 el candidato de los Partidos Unidos a la Presidencia de la República fué otro condómino de Santa Catalina, Don Manuel José de la Cruz Ocampo y Gonsález,<sup>8275</sup> primo hermano carnal de Felipe Díaz y de la suegra de Roca y Juárez Celman.

También en Cuyo había prevalecido una elite de extracción Nacionalista Mitrista. Pero en Mendoza, el Presidente Roca "...rompió este aro de hierro [la familia Villanueva] en que tenían envuelta a la provincia", valiéndose del General Rufino Ortega, (a) "El Chanco Colorado", miembro de la llamada "Liga de Beduínos",<sup>8276</sup> quien llevó al gobierno a José Miguel Segura Galdámez,<sup>8277</sup> "...que no era de la familia".<sup>8278</sup> Inmediatamente la Liga de Beduínos hizo sentir sus influjos nocivos que afectaron la educación, el periodismo y la banca de la provincia. El Gobernador Rufino Ortega le informaba a Roca que el Dr. Abraham Lemos, Periodista y Profesor de Historia Natural, "...era enemigo declarado del Gobierno de la Nación y del de esta Provincia", no así los jóvenes Tiburcio Benegas y Leopoldo Díaz, quienes tenían el peso de la administración, dirección y redacción de La Palabra (Mendoza).<sup>8279</sup> Las ideas del Dr. Lemos, contrarias al gobierno

"...las ha hecho conocer bien claramente en el Ferrocarril,<sup>8280</sup> diario que en sus columnas hace fuego a todo lo que hoy existe y que puede considerarse órgano de oposición".<sup>8281</sup>

En ese entonces las operaciones de prensa con fines políticos estaban a la orden del día. Para el Gobernador Rufino Ortega, el lenguaje utilizado por los periódicos El Ferrocarril (Mendoza),<sup>8282</sup> y Los Andes (Mendoza),<sup>8283</sup> era

"...soez, grosero, e indigno de una prensa culta,..., convencería al más obstinado de la pasión, del despecho y de la rabia que a sus redactores domina, así es que toda contemplación que se les tenga es machacar a hierro frío".<sup>8284</sup>

No debería extrañar, sigue Ortega,

"...que llegue un momento en que se tengan que emplear medios que conjuren una situación que procuro mantenerla a fuerza de calma y de paciencia. Pero todo tiene sus límites, máxime cuando se comprende el fin desmoralizador y subversivo de la prensa local".<sup>8285</sup>

Al Gobernador Ortega le constaba que en enero de 1885 los redactores de los periódicos El Ferrocarril, y Los Andes,

"...están comprados por el círculo Rochista, habiendo recibido la consigna de atacar, por ahora a los Ministros, dejando para más tarde el atacarme a mí, pues se cuenta o se cree que yo pudiera responder a las miras y trabajos de Rocha".<sup>8286</sup>

Pese a estas supuestas prácticas venales, siguió rigiendo en Mendoza el partido liberal, hasta que vino el Gobernador Tiburcio Benegas Ortiz,<sup>8287</sup> quien respondía a Roca, y con él se "...volvió a restaurar aquel gobierno de familia, con 17 parientes diputados a la legislatura".<sup>8288</sup> Los Bancos Nacional y Provincial eran en 1888, según el ex-Gobernador Ortega, "...el cuartel general de nuestros opositores, ambos establecimientos están completamente a disposición del [Gobernador Tiburcio] Benegas".<sup>8289</sup> Esta cruda realidad le hacía decir al periodista puntano Joaquín Carlés que "...el sentido práctico de los argentinos repugna ya lo mismo la prédica insensata de la oposición sistemada que la oligarquía y el nepotismo de los gobiernos".<sup>8290</sup> A pretexto de una reunión iniciada por ex-Rochistas,<sup>8291</sup> el Gobernador Benegas se entrevistó con ambos ministros y con cuatro o cinco personas y decidieron constituir un comité de partido, confiándole la dirección a D. Francisco Civit.<sup>8292</sup> El propio Rufino Ortega, al referirse al gobierno de Benegas, cuenta que

"...aunque mis amigos me asediaban para que me pusiera en campaña porque ya veían venir la traición que se preparaba, no quise dar ningún paso sin ponernos de acuerdo".<sup>8293</sup>

En 1888, en oportunidad de confeccionarse una lista de Diputados para la renovación de la Legislatura --la operación política más ambicionada por los políticos, pues con ella se distribuían los llamados incentivos selectivos-- el Senador y ex-Gobernador Rufino Ortega,<sup>8294</sup> ausente en Buenos Aires, fiel a una larga tradición autoritaria, no pudo consentir

"...en que se eligieran Diputados sin su previa disección y lanzó sus frases coléricas a todos los vientos llenando de denuestos al Gobernador".<sup>8295</sup>

Y el mismo año 1888, en Santa Fé, el Gobernador José Gálvez proclamaba en una reunión de empleados candidato a Gobernador a su propio Ministro de Gobierno "...diciendo que lo hacía como Jefe de partido no como Gobernador".<sup>8296</sup>

#### **X-V Destitución por putsch militar. El caso de Tucumán.**

En Tucumán, provincia perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya primacía se la disputaban los Autonomismos Juarista (anti-clerical) e Irigoyenista (mazorquero o Derquista),<sup>8297</sup> el triunfo presidencial de Juárez Celman precipitó una crisis política de proporciones.<sup>8298</sup> Tucumán era, al igual que Rosario y Córdoba, un lugar clave, por tener la sede de la dirección de la Oficina de Telégrafos, desde donde se retransmitían los mensajes para Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.<sup>8299</sup> Con razón, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con tanta elocuencia que

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".<sup>8300</sup>

El Juarismo Tucumano desató tal oposición contra el Irigoyenismo Bernardista en el poder de la provincia (Santiago Gallo), ayudado por el diario El Deber,<sup>8301</sup> que de nada sirvieron las ofertas de transacción formuladas por Roca.<sup>8302</sup> La postulación de Juan Posse Talavera,<sup>8303</sup> por parte del Irigoyenismo y su órgano periodístico El Orden,<sup>8304</sup> desencadenó la candidatura Juarista del Coronel Lídoro Quinteros,<sup>8305</sup> pero el Colegio Electoral optó por el primero. Tras el fiasco de haber concertado Posse con el Rochista Pío Uriburu el apoyo militar a los Catamarqueños Lisandro Olmos y Dr. Federico Espeche, para invadir Catamarca a efectos de impedir la candidatura del Mayor José Silvano Daza, Posse formuló a la oposición Juarista ofertas de conciliación. Estas fueron interpretadas como un signo de debilidad y resultaron contraproducentes, pues alentaron el clima golpista o putschista.<sup>8306</sup>

Al año de haber asumido la gobernación Juan Posse, en mayo de 1887, aprovechando la ausencia del Gral. Roca del país, y con la excusa de la violencia electoral, el nepotismo y los conatos de asesinatos a periodistas,<sup>8307</sup> pero en realidad por el sólo motivo de haber sostenido la candidatura presidencial del ex-Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, Juan Posse fue derrocado por el Regimiento No.4 de Infantería procedente de Córdoba, en connivencia con la Dirección Nacional de Ferrocarriles.<sup>8308</sup> La peculiaridad de este derrocamiento fue que en esta oportunidad por primera vez en la historia política argentina las tropas golpistas se transportaron aceleradamente por ferrocarril, cual si fuera una moderna blitzkrieg, desarticulando en los hechos la supuesta unidad del ejército nacional.<sup>8309</sup> Este Regimiento estaba bajo la dirección del Administrador del Ferrocarril Central Norte y ex-candidato a Gobernador, Cnel. Lídoro Quinteros, quien se hallaba alentado por el Gobernador de Córdoba Marcos Juárez, hermano del Presidente de la República, y por su Ministro de Gobierno José Figueroa Alcorta.<sup>8310</sup> El día que se enjuició en la Legislatura de Tucumán la gestión gubernativa de Juan Posse, el Presidente Juárez Celman le informaba a Roca que

"...se han encarcelado 6 u 8 ciudadanos respetables [entre ellos Silvano Bores], manteniéndolos incomunicados en una letrina de la policía...por el delito de haber transcrito un suelto de otro diario".<sup>8311</sup>

Según Juárez Celman,

"...Don Juan [Posse], a diferencia de la Reina Victoria, lejos de alarmarse por las presiones, palizas, y conatos de asesinatos a periodistas, las encontraba lo más natural del mundo y hasta autorizados por un Reglamento de Policía que a pesar de lo que dispone la Constitución Nacional le daba a un Jefe funciones judiciales".<sup>8312</sup>

Indudablemente, especulaba Juárez Celman, "...si en Tucumán hubieran sido tratados los periodistas, como los sirvientes lo son en Inglaterra, la revolución [de 1887] no hubiera tenido lugar".<sup>8313</sup>

Con referencia a la fractura política o violenta transición sufrida por Tucumán, el propio Roca, desde Europa había teleografiado condenando la revolución como desdolorosa para el país, y opinando por el inmediato restablecimiento de las personas derrocadas.<sup>8314</sup> Habían pasado cinco (5) largos años desde que Roca había contribuido al derrocamiento del Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino, y tres (3) años desde que se atentó en San Juan contra la vida del Senador Nacional Agustín Gómez, y ya nadie se acordaba de los mismos para refutarlo.<sup>8315</sup> Y casi un mes después, en Junio de 1887, el Vice-Presidente Carlos Pellegrini,<sup>8316</sup> le escribía a Roca, que una revolución que derroca autoridades, aprisiona ciudadanos y decide cuestiones de preponderancia a balazos, dejando en las calles y plazas un centenar de muertos y heridos, "...nos recuerda que aún somos una república Sud-Americana ¿Será la última? Dios lo quiera".<sup>8317</sup> En cuanto al hecho político en sí, el mismo Pellegrini se decía que "...no podía aprobar ni apoyar semejante hecho y no quería ni debía aparecer del lado de la oposición que lo condenaba y hacía armas contra el Presidente [Juárez Celman]".<sup>8318</sup> El Senado, en forma casi unánime, condenó el acto sedicioso,<sup>8319</sup> pero se hallaba también, al decir de Pellegrini, "...en mi mismo caso".<sup>8320</sup> Finalmente, Pellegrini consiguió un despacho que salvando en cierta manera la responsabilidad del Senado fuera aceptado por el gobierno de Juárez Celman.<sup>8321</sup>

Con respecto a la intervención Tucumana y la necesaria transición o salida institucional, Pellegrini le contaba a Roca que "...irá la intervención [Salustiano] Zavalía, declarará que Posse fué mal electo, convocará a nuevas elecciones y resultará gobernador [Líboro] Quinteros", como de hecho lo fué.<sup>8322</sup> El verdadero escollo institucional de la Intervención Zavalía no lo constituía la elección del Gobernador sino la de la Legislatura. Por lo general, las intervenciones federales eran hasta entonces restringidas y no ampliadas, reduciéndose a intervenir el Poder Ejecutivo y permitiendo la continuidad de los Poderes Legislativo y Judicial. A la intención de disolver la Legislatura, Carlos Pellegrini le confesaba a Roca que "...no se como harán".<sup>8323</sup> Como precedente, Pellegrini reputaba la anulación de la Legislatura como malísima, pero "...en política tienen razón los que la tienen al día siguiente, pues en medio de la lucha los que aparecen tener razón son los más exaltados".<sup>8324</sup> Pellegrini tenía la plena seguridad de que el Presidente "...no tenía conocimiento de que la revolución iba a estallar en el momento en que se produjo".<sup>8325</sup> Sus amigos calcularon que "...una vez lanzados, [el Presidente] no los abandonaría, y se precipitaron".<sup>8326</sup> Pero ya sea por demasiado complaciente con sus amigos, ya sea porque su espíritu estaba debilitado "...la verdad es que el hecho ha sido tolerado de manera a dar margen al cargo de complicidad".<sup>8327</sup> Por cierto, Juárez Celman negaba rotundamente haber estado en autos de un hecho, que por su naturaleza terrorista le quemaba las manos.<sup>8328</sup>

Las explicaciones que se dieron a esta violenta fractura política o transición por colapso (putsch militar) fueron diversas, desde las clásicas de nepotismo, la violencia electoral y la violación de la libertad de prensa (conatos de asesinatos a periodistas), hasta aquellas que atribuían al Gobierno Nacional el afán continuista de perpetuarse en el poder.<sup>8329</sup> En el debate que se suscitó en la Cámara de Diputados de la Nación a propósito de la Intervención a Tucumán, el Diputado Delfín Gallo Terán,<sup>8330</sup> delataba que el Veedor Dr. Salustiano Zavalía, enviado por el Presidente Juárez Celman, había dicho a Emidio Posse que su familia [la de los Posse] "...no era mas que una pantalla: que aquella situación era de los Colombres, de los Gallos, de los Terán y que se yo de quienes más; que ellos eran simples instrumentos para servir a propósitos ajenos".<sup>8331</sup> Es conveniente aclarar que para la época del putsch del Coronel Lídoro Quinteros (1887) la familia Posse se hallaba profundamente dividida.<sup>8332</sup> Era aplicable en este caso, para el Ministro del Interior y el Diputado Nacional Lucio V. Mansilla, la doctrina del derecho de la revolución triunfante, esgrimida por la Corte en 1865, reconociendo la validez de una resolución dictada por el Gral. Mitre después de Pavón, para justificar el derrocamiento de Derqui y la convocatoria electoral.<sup>8333</sup> Gallo expresaba, contra el parecer del Ministro y del Diputado Mansilla, que los pueblos sólo tienen el recurso supremo de la revolución "...cuando no hay ninguna de las garantías fundamentales respetadas".<sup>8334</sup> Gallo sostenía que no es posible que exista el derecho de revolución, defendido por Mansilla,

"...en un pueblo constituido, en un pueblo donde funcionan todos los altos poderes que dirigen la sociedad, en un pueblo que tiene por medio de estos poderes todos los resortes necesarios para llevar la justicia, el derecho, a cualquiera de los ámbitos del territorio de la república".<sup>8335</sup>

Consagrar este derecho, era "...consagrar la anarquía, la barbarie. Sería volver a aquellos tiempos en que se nos llamaba todavía South America, como un mote oprobioso, por los pueblos libres de la tierra".<sup>8336</sup> La cuestión de Tucumán envolvía para Gallo,

"...para la nación entera una cuestión de principios: son todas las instituciones fundamentales de la república las que se encuentran en peligro. Sostener que es permitido hacer revoluciones, derrocar autoridades, sostener, sobre todo, que esas revoluciones, que esas sediciones debían ser cobijadas, amparadas por la protección del gobierno nacional, o que deben ser siquiera veladas por éste, importa declarar que todas las conquistas alcanzadas, después de tantos esfuerzos y después de tantas luchas, han sido completamente inútiles para nosotros".<sup>8337</sup>

Importaba --en términos más actuales, que Gallo no supo o no quiso articular-- consagrar el terrorismo de estado. Terminaba Gallo su alocución, presagiando un funesto porvenir, pues "...Queda el coro armonioso y uniforme. Pero ¡ay de nosotros Sr. Presidente!, si ese coro armonioso y uniforme sirve también para entonar el réquiem sobre el túmulo en que reposan las más primordiales, las más fundamentales, las más sagradas de las libertades de la República".<sup>8338</sup>

## **X-VI La resistencia al putsch. El caso de Catamarca.**

En cuanto a Catamarca, la respuesta Rochista al fraude electoral no se hizo esperar. En Diciembre de 1885, el Comandante Agüero, de Santa María, le avisaba al Gobernador Sargento Mayor José Silvano Daza, que al amanecer del 31 fue atacado por

"...50 a 60 gauchos [procedentes de Tucumán], capitaneados por un titulado Comandante Calderón, después de una lucha regular, donde quedaron algunos muertos y heridos de ambas partes, fueron vencidos y aprehendidos los revoltosos, entre ellos el cabecilla Calderón".<sup>8339</sup>

También informaba Agüero que

"...inmediato al Departamento de Santa Rosa, en Tala-Sacha, perteneciente a la provincia de Tucumán, ha habido una especie de Cuartel General en donde se ha estado equipando y mandando gauchos a esta Provincia, y actualmente sé de una manera evidente que existen más de 100 hombres perfectamente equipados con armas de precisión capitaneados por el ex-Comandante de Santa Rosa, Isidoro Gómez, que está jaqueando a los Departamentos de Santa Rosa, La Paz y Alto".<sup>8340</sup>

Daza le había pasado sendos oficios telegráficos relatándole los sucesos ocurridos al Gobernador de Tucumán Santiago Gallo,<sup>8341</sup> "...previniéndole que si ese gobierno no tomaba rápidas medidas reparadoras, entonces yo como gobernante me obligaba a asumir una actitud enérgica para hacer respetar la autonomía de la Provincia",<sup>8342</sup> pero este Gobernador no le había contestado ninguno de ellos. Al año siguiente, en 1886, desde Catamarca, un anónimo denunciaba a Roca que en Pomán

"...atacaron un oficial con 7 gendarmes que estaba haciendo guardar el orden, una turba de 400 gauchos y en seguida se parapetaron en la casa del Cura Párroco. El oficial fue herido y dos de los sargentos gravemente".<sup>8343</sup>

Y que en el Ambato,

"...encabezados por el Cura, también cargaron turbas cerca de 500 gauchos perfectamente bien armados con Wesson y remington se han tomado 5 rifles pertenecientes a la oficina de este Enganche y una espada del Jefe de Enganche, según me aseguran".<sup>8344</sup>

Para Febrero de 1886, Lisandro Olmos, el Dr. Espeche y otros hombres de prestigio de Catamarca se encontraban en Tucumán. Se hallaban "...en la mayor intimidad con los prohombres de los Partidos Unidos [cuya candidatura presidencial la llevaba Manuel Ocampo]".<sup>8345</sup> Aún mas, el Juarista catamarqueño Baltasar Lema,<sup>8346</sup> sospechaba que "...estén fraguando alguna combinación hostil a nuestro popular candidato [Daza]".<sup>8347</sup> El propio Daza, tuvo que afrontar no solo la fama de anti-clerical que le habían endilgado los Irigoyenistas (mazorqueros), remontada merced a su personalidad fuertemente dotada de disposiciones psico-culturales notorias por su tolerancia, sino también las hostilidades de los Tucumanos. Daza le denunciaba a Roca que "...puedo probar las complicidades de las autoridades [Irigoyenistas] de aquella provincia [Tucumán], con los sediciosos y ambiciosos adversarios".<sup>8348</sup> El Ministro de Gobierno de Tucumán Delfin Gigena,<sup>8349</sup> "...ha tocado todos los resortes que a su alcance han estado para dominar a esta Provincia [Catamarca], pero todas sus pretenciones fatuas han quedado completamente desbaratadas".<sup>8350</sup> Y para Julio de 1886, el Gobernador Daza se ufanaba de haber "...conseguido desmembrar a las fracciones de esta Provincia".<sup>8351</sup> Y siendo para Guillermo Leguizamón,<sup>8352</sup> "...el Dr. Castro gobernado como nadie lo ignora, por [Líndor] Sotomayor y [Federico] Espeche, la influencia predominante en la opinión es la del Dr. Rocha".<sup>8353</sup>

## **X-VII Destitución por putsch militar. El caso de Mendoza.**

Aprovechando como excusa la cuestión del nepotismo y la distribución del agua,<sup>8354</sup> y a dos años de la ruptura o involución política o violenta transición (putsch o golpe de estado) perpetrada en Tucumán, el 7 de Enero de 1889, un acontecimiento semejante se repite en Mendoza, encabezado por el ex-Gobernador Rufino Ortega, (a) "El Chanco Colorado", quien imitando al Tucumano Quinteros derrocó, mediante las fuerzas del Regimiento 12 de Línea, al Gobernador Tiburcio Benegas Ortiz, desarticulando así también la supuesta unidad del ejército nacional.<sup>8355</sup> Este Regimiento estaba bajo la dirección del ex-Gobernador Ortega, quien también se hallaba alentado por el Gobernador de Córdoba Marcos Juárez, hermano del Presidente de la República. La originalidad de este putsch consistía, para el corresponsal de El Diario, en que estaba dirigido ya no contra Bernardo de Irigoyen, como en el caso de Tucumán, sino contra Roca, pues "...es a la influencia del ex-Presidente a la que se hace fuego, no se quiere dejar ni vestigios de su perdida influencia".<sup>8356</sup> Y para el Ministro Eduardo Wilde, quien a las dos semanas renunció al Ministerio, el caso de Mendoza, "...era caso de conciencia, de reputación y de compromiso en que se jugaba a más la suerte de un condiscípulo y amigo que nada había hecho para ser derrocado".<sup>8357</sup> Sin embargo, para el miembro fundador del Partido Autonomista de Mendoza, y que fuera Senador Nacional, Benito Villanueva González,<sup>8358</sup> la revolución de 1889 en Mendoza, incitada por el gobierno de Juárez Celman, "...debe considerarse una revolución santa,...porque destruyó la oligarquía del partido liberal".<sup>8359</sup>

Según Olguín (1961), la revolución fue urdida por Ramon J. Cárcano.<sup>8360</sup> Rufino Ortega se había dirigido a Cárcano en vísperas del colapso institucional (golpe de estado), para que en caso de decidirse por el putsch "...sírvasse decirme antes del domingo por telegrama 'mande ganado a Chile'".<sup>8361</sup> Sin embargo, semanas después de los sucesos, Cárcano le escribe a Juárez Celman reconociendo haber estado al tanto de lo que iba suceder pero negando absolutamente toda complicidad.<sup>8362</sup> Una vez caído el Gobernador Benegas, tras la efímera asunción de Antonio Bermejo, el gobierno federal envió la intervención de Manuel Derqui. Esta última fue duramente resistida tanto por el Orteguismo como por la Legislatura.<sup>8363</sup> El diario Los Andes, suscripto en ese entonces al Orteguismo, le echaba en cara a Derqui su conducta pasada en Corrientes, donde contribuyó al derrocamiento del Gobernador Gallino.<sup>8364</sup>

Finalmente, por acuerdo de las facciones Orteguista y Beneguista (o Civitista), la Legislatura designó en Junio de 1889 al Dr. Oseas Guiñazú Estrella.<sup>8365</sup> Este último, que no contaba con partido alguno, con el fin de ampliar su base de sustentación política, ofreció dar al partido de Benegas el Ministerio de Hacienda, y participación en las elecciones de Diputados renovantes y municipales, con candidatos nombrados de común acuerdo.<sup>8366</sup> Pero por desgracia, las negociaciones fracasaron, por cuanto Benegas exigió "...los dos Ministerios, o el nombramiento de un Ministerio General designado de entre sus amigos".<sup>8367</sup> En presencia de tan grave exigencia, Guiñazú llamó a sus correligionarios Diputados a fin de consultarlos, y

"...todos ellos unánimemente, resistieron aquella concesión por considerarla desde ya como absorbente de nuestras respectivas personalidades o roles políticos, avanzándose algunos de esos amigos con amenazas de separarse de mi lado en caso que yo accediera a tales condiciones".<sup>8368</sup>

Luego, en virtud del fracaso de las negociaciones con los Liberales, Guiñazú asoció a un joven caudillo popular llamado José Néstor Lencinas Videla,<sup>8369</sup> e hizo incluir en la lista de Diputados aprobada en octubre de 1889, a varios de sus propios parientes, entre ellos a su hermano David Guiñazú, a Belisario Serpa, y a Silverio Gordillo; y más luego, apenas producido en Buenos Aires el fenómeno revolucionario de Julio de 1890, incorporó a su gabinete al Dr. Julián Barraquero.<sup>8370</sup>

Los grupos políticos dominantes estaban constituidos por los Guiñazuístas, y los Liberales. Los Guiñazuístas no tenían mas que cinco votos en la Legislatura, y de acuerdo con Francisco Uriburu, "...no puede considerarse que forman un partido político".<sup>8371</sup> Los Liberales, en tanto que tenían siete votos en la Legislatura, poseían según Uriburu

"...hombres de gobierno, con ilustración bastante, tienen importantes elementos electorales, pero es un partido casi en disolución. Benegas no quiere tomar parte en nada, Civit se retira, Deoclesio García hace lo mismo, y no teniendo una dirección respetada, la anarquía concluye con esos elementos que serían muy hábiles para nuestro partido".<sup>8372</sup>

Según Emilio Civit, líder de los Liberales, Ortega pidió a Guiñazú que persiga y anule a los liberales,

"...tan inútilmente como pretendió hacer creer a Marcos Juárez que mi padre, Serú, y yo eramos los autores o instigadores de la silbatina de marras, obra espontánea de los muchachos del Colegio Nacional como muy bien le constaba".<sup>8373</sup>

Guiñazú tenía ahora, a juicio de Civit, "...lo que antes ni siquiera conocía: opinión a su alrededor para sostenerlo y apoyarlo contra Ortega y contra Roca".<sup>8374</sup> Ortega, en tanto, estaba --para Civit-- fundido. El hecho de buscarlo a Zapata una semana después de llegar a Mendoza "...y cuando ha tenido tiempo de convencerse de su impotencia, prueba bien claramente que solo, nada puede".<sup>8375</sup> Dos veces había hablado Ortega con Zapata, sin que este último pudiera adelantarle nada, por cuanto aún no conocía la opinión de sus amigos: Ezequiel Tabanera, Juan Eugenio Serú,<sup>8376</sup> Joaquín y Elías Villanueva,<sup>8377</sup> Agustín Videla,<sup>8378</sup> y Emilio Civit.<sup>8379</sup> Civit no le negaba a Ortega condiciones para la lucha:

"...actividad infatigable, constancia y tenacidad tremendas, mentiroso y de un tupé a prueba de bomba, pero hasta hoy no sabe lo que es pelear de abajo, sistema que nosotros conocemos ya y podemos apreciar".<sup>8380</sup>

Tal era la resistencia contra Ortega "...que no podrá vencerla con los Bancos y tal vez ni Vd. mismo lo conseguiría metiéndose hasta las narices en su favor".<sup>8381</sup> Se había hecho "...conciencia pública, se ha hecho carne, una especie de dogma que no se discute, que se debe ir contra él y contra los que lo apoyen y de aquí viene la atmósfera que se levanta contra Roca".<sup>8382</sup> La unión o fusión con Ortega le parecía a Civit

"...perjudicial y contraproducente, y muy difícil de encontrar la fórmula que la realice, dado el carácter de Ortega, pues ha de querer ser Jefe y Director y si efectivamente no lo es, hará por que todos crean que es él, el que manda y gobierna".<sup>8383</sup>

No obstante su carácter, Civit consideraba que en la lucha que se inicie "...no debemos...quebrarlo o romperlo por que es elemento que sirve".<sup>8384</sup> La cuestión era

encontrar el justo medio "...que no lo deprima ni lo perjudique a él, que no nos deprima a nosotros y que no perjudique y haga daño a la causa que sostenemos".<sup>8385</sup> Suprimida la 'situación' y modificada en un sentido más benigno para Ortega, "...al menos salvará su porvenir financiero y aseguraría las leguas que desea".<sup>8386</sup> Tal como estaba Ortega "...nada puede ni nada vale aquí con probabilidades de triunfo y las próximas elecciones municipales y de Diputados las tiene irremisiblemente perdidas".<sup>8387</sup> Teniendo Cívicos y Guiñazuístas mayoría en la Legislatura "...no sería difícil... dicten de un día para otro una ley declarando caduca la concesión de Malargüe [propiedad de Ortega]".<sup>8388</sup>

En tanto, la conducta observada por los Guiñazuístas y los Liberales para con los Orteguistas distaba también de ser cordial. Para Ortega, la actitud de los Liberales

"...no ha sido ni medianamente correcta ni siquiera disculpable. Su política ha sido pura y simplemente de exclusiones para nosotros, pero con un carácter doblemente irritante para mis amigos porque se prescindió siempre de nosotros".<sup>8389</sup>

Según Ortega, los Liberales no los buscaban como colectividad sino que se trató siempre de cooptarles los cuadros políticos, "...absorvernlos individualmente, provocando la anarquía del Partido y su disolución para incorporar después sus elementos a la fracción Liberal y suprimir de hecho nuestra personalidad política".<sup>8390</sup> En cuanto a la coalición de Guiñazú y su círculo con la Unión Cívica, Ortega entendía que

"...lo capital en esta alianza inusitada es el factor o agente oculto que la ha preparado...Este agente ha sido el Dr. Barraquero, quien ha sido llamado de Buenos Aires, no para participar simplemente del gobierno, sino para trabajar hombres y cosas y producir la alianza de Guiñazú y los Cívicos, sirviendo así un plan premeditado contrario a nosotros".<sup>8391</sup>

En cuanto a San Juan, su economía se hallaba en una crisis profunda. El Banco de Cuyo, con sede en San Juan, había entrado en liquidación.<sup>8392</sup> Y como siempre ocurre en estos casos, hubo quienes quisieron manipular la convocatoria de acreedores políticamente. Como la mayoría de los accionistas tenía interés en un arreglo que se haría con el Banco Nacional,<sup>8393</sup> los tenedores de una tercera parte de las acciones, propiedad de Clemente y Juan José Videla,<sup>8394</sup> se opusieron a ello. Estando el Banco en manos de ellos "...obtienen ventajas que no alcanzan a los otros accionistas, a la vez que les sirve la institución de poderosa arma política".<sup>8395</sup>

Apercibido de las graves dificultades que le acarrearía la venalidad de sus hombres, el Gobernador Carlos Doncel --quien había sustituido en el mando a Anacleto Gil (h) luego del frustrado putsch de Febrero de 1884-- descubre que la mejor forma de combatir el dinero de Rocha era con el indiscriminado empleo estatal. Le aseguraba a Rocha que "...cuido de conjurarlos",<sup>8396</sup> para lo cual le manifiesta necesitar "...una buena y oportuna distribución de los empleos nacionales", con los cuales "...luchar contra el dinero que con tanta liberalidad ha empezado a distribuirse".<sup>8397</sup> Para el Juarista cordobés Pedro A. Garro, Doncel gobierna

"...con Rocha o sea con sus agentes asalariados. Comenzando por el Presidente de la Legislatura un tal [Moisés] Cardozo, [(a) "El Leguito"] hasta finalizar con el Comandante del piquete y los porteros de la Casa de Gobierno".<sup>8398</sup>

Respecto a la cuestión Presidencial, cada vez más próxima "...las opiniones de Mallea, trasciende a Rochismo por todas partes, y así han de ser los otros con excepción de Doncel, pero no dudo que con la modificación del Ministerio, y cuando ya maduren las cosas, se han de venir por el buen camino [el Juarismo]".<sup>8399</sup>

En cuanto a la situación provincial, el roquista Luis Cané cree que de acuerdo a

"...la última entrevista que he tenido con Mallea, que fue ayer, he sacado en limpio, que él desea a toda costa ser Gobernador, siendo cosa definitivamente arreglada la renuncia de Doncel en breve".<sup>8400</sup>

Pero como entre Doncel y Mallea había una marcada anarquía, Mallea teme "...hacerse cargo del gobierno en esas condiciones y así demuestra que hay una fracción encabezada por [Facundo] Maradona que trabaja en descubierto por Rocha".<sup>8401</sup> Ahora bien, pareciera que Mallea estaba conforme con asumir el mando

"...apoyado por nuestro partido autonomista, y para empezar, está también de acuerdo en ceder un Ministerio, que ocupará nuestro amigo Aráoz (Saturnino J.)".<sup>8402</sup>

Finalmente, los Autonomistas disidentes, entre los que se hallan, a juicio del Juarista Pedro Garro, personas de notoria importancia, cansados de esperar, anulados por las hostilidades del Gobierno o decepcionados por su aparente desprecio, "...comienzan a organizarse al servicio del Dr. [Bernardo de] Irigoyen".<sup>8403</sup>

En cuanto a los situacionistas, con el propósito de desarmar y atraer al lado de la coalición oficialista al mayor número de los hombres del círculo que hizo la Revolución de Febrero de 1884, que terminó por ultimar al Senador Agustín Gómez, el Gobernador Carlos Doncel designó de Ministro de Gobierno al Dr. Sánchez Benavídez. Estas actitudes le hacían decir a un Juarista en carta a Juárez Celman,

"...Doncel Vd. sabe como gobierna, vive sobre fuego, sus amigos han prometido rodearlo, pero hasta este momento no lo hacen. Les he escrito ayer a Posse, Sánchez Benavídez exhortándolos a que lleven a efecto su programa, y hoy me dispongo a escribir nuevamente a Posse indicándole la conveniencia de que Doncel dé un té en su casa a la que concurren todos sus amigos para ese día, yo me trasladaré a San Juan, iré con Serú, Astorga y otros amigos para manejar? la gente y rodear a Doncel".<sup>8404</sup>

Por cuanto una gran mayoría de los amigos duros del Gobierno tenía una visible repugnancia por esta coalición (con la facción moderada del círculo que hizo la Revolución de Febrero de 1884), Doncel, que era el líder de la facción reformista de la coalición oficialista, le previno a su Ministro de Gobierno Sánchez Benavídez que era necesario proceder con toda prudencia pues

"...poco a poco podía vencerse esa repugnancia, entrando sus amigos a tomar parte activa en la próxima lucha, formando parte de los clubes locales que se organizarían, pues siempre la lucha con propósitos comunes crea vínculos".<sup>8405</sup>

Pero Sánchez, precipitado por exigencias que procedían probablemente de Ramón Castañeda,<sup>8406</sup> y de otros sujetos que lo rodeaban, pretendió que desde luego se les diese a los conspiradores de Febrero "...posiciones influyentes desde donde podrían, si entraban de mala fe traer al Gobierno serios inconvenientes, a lo que yo me negué terminantemente".<sup>8407</sup> Como esta actitud no podía cohonestarse, Doncel nombró para reemplazarlo al Dr. Tristán Ríos.

Conservar a los Rochistas en sus empleos, fomentarles con su tolerancia la propaganda opositora que hacían y excluir los que fueron sus adversarios y que hoy son sus amigos, era para un Juarista al que no he podido identificar una política incorrecta. El Juarista anónimo le informaba a Juárez Celman que "...bien poco o nada podrá hacer [Doncel] pues difícilmente llegaría así [con esta política] a disponer de la influencia política del Gobierno".<sup>8408</sup> Según el Rochista Luis del Carril,<sup>8409</sup> Doncel es Roquista, pero

"...sin carácter ni influencias y son los hombres de su círculo y no él los que gobiernan estando más cerca de Rocha que de nadie. Mallea se impondría a sus amigos y los traería a sostener la política del Presidente, imponiéndose desde ya el compromiso de nombrar Ministros amigos de esa política y hasta de su candidatura, incorporando también a los amigos del Presidente que separó del lado de aquel Gobierno la revolución de Gómez".<sup>8410</sup>

Finalmente, el resultado electoral fue desfavorable al Rochismo, pero

"...las numerosas prisiones de parte de los agentes de policía en la ciudad y de los Subdelegados en los Departamentos, con el determinado objeto de menoscabar las fuerzas populares que no obedecían a sus caprichos, no han sido suficientemente poderosas para dominarla e impedir que concurráramos a las urnas".<sup>8411</sup>

Con el advenimiento del Juarismo al poder, la justificada animadversión que existía entre el Gobernador Carlos Doncel y el Diputado Nacional J. P. Albarracín con el Círculo amotinado en Febrero del 84, parece que a comienzos del 86 se debilitó, merced a la eficaz cooperación de amigables componedores tales como Ignacio Sarmiento, Román Videla,<sup>8412</sup> Saturnino Aráoz, el Dr. Pedro Garro, y el Juez Numa Benavidez, y según Sánchez Benavidez, han

"...mediado ya algunas conferencias muy amistosas con Gil y Mallea, en que nosotros les hemos manifestado de la manera más explícita nuestra voluntad como amigos de Vd. de incorporarnos al Club del Pueblo para armonizar más todavía la unidad de idea y de acción".<sup>8413</sup>

En 1886, la Legislatura Sanjuanina seguía siendo campo de maniobras de los Gobernadores para elegir sus alquilones.<sup>8414</sup> El Gobernador de Mendoza Rufino Ortega le pedía a J. Roca --con el fin de llenar la vacante ocurrida en el Senado Nacional en representación de San Juan, por la renuncia de Anacleto Gil--<sup>8415</sup> que enviara cartas al propio renunciante y nuevo Senador electo Anacleto Gil (h) y al Diputado Nacional Belisario Albarracín,<sup>8416</sup> pidiéndoles "...su influencia con los amigos", y a diversos Diputados Provinciales,<sup>8417</sup> "...su voto y sus trabajos entre sus colegas de la Legislatura".<sup>8418</sup>

Con respecto a la elección presidencial en que Juárez Celman fue electo, el Gobernador Carlos Doncel aludió a la venalidad del procedimiento utilizado. Este se

extendió a la elección de los Representantes a la Legislatura Provincial, en que se hicieron presentes fuertes contingentes, formados por peonadas del Ferrocarril, enviadas desde Mendoza y oportunamente denunciadas en el Congreso Nacional.<sup>8419</sup> Con la expectativa de la elección del Senador Nacional, de la que resultó elegido Anacleto Gil en reemplazo de Rafael Igarzábal,<sup>8420</sup> el roquista José Pedro Cortínez,<sup>8421</sup>

"...estaba muy empeñado en comprar votos en la Legislatura, y llegó hasta ofrecer a algunos Diputados, con todas las reservas del caso, hasta doce mil pesos nacionales. Tenía para este objeto, según él lo decía, 50 mil pesos que Rocha lo había autorizado a gastar para que se hiciera nombrar Senador, y hacía valer también cartas de recomendación de su hermano Santiago, consiguiendo por este último medio el voto de Giles".<sup>8422</sup>

Pero como para resguardarse de un eventual fracaso del Juarismo, dos años más tarde, en 1888, Hermógenes Ruiz,<sup>8423</sup> senador por un año de los nuevos Situacionistas de San Juan, le manifestó al Diputado Nacional por Mendoza y ex-Gobernador Delegado Isaac Chavarría, para que se lo transmitiera a Roca, que aunque los caídos por el cambio operado se creen y se llaman Roquistas puros --ellos los Situacionistas lo son también--

"...que el cambio no tiene otro alcance que el desalojo de Gil, Mallea, Juan Pablo y demás de la familia, pero que el partido no ha cambiado de frente, sino de Gefe. Gil que atribuye la evolución a [Ramón J.] Cárcano ha tenido una agarrada fuerte con éste. El Dr. Doncel ha tenido que quebrar con Gil para permanecer dentro del partido. Sea o no cierto lo que afirma Ruiz, el caso es que no quieren aparecer anti-Roquistas".<sup>8424</sup>

#### **X-VIII.- Cooptación de miembros de las clases subalternas.**

En cuanto a la estrategia de las elites respecto a ciertos miembros de las clases subalternas (exclusión, inclusión y cooptación o dilución), el que personas de origen humilde fueran toleradas en posiciones de elite dentro del aparato estatal, no faculta para sostener que ello era el producto de una revolución social, sino por el contrario el resultado de lo que Miliband (1970, 1988) denomina fenómenos de dilución social y otros autores fenómenos de cooptación o inclusión.<sup>8425</sup> La supuesta existencia de este fenómeno no ameritaba en modo alguno un proceso de democratización, pues se trataría en realidad de un proceso de oligarquización "...de los reclutas más aptos y dignos de confianza provenientes de las clases subordinadas".<sup>8426</sup> Este proceso de dilución social no afectaría, según Miliband, "...al carácter de clase del servicio del Estado, y en verdad puede fortalecerlo".<sup>8427</sup> Con respecto a Tucumán, el Diputado Nacional Melitón Caamaño, Juarista, al referirse a los Gobernadores Lídoro Quinteros,<sup>8428</sup> Silvano Bores, (a) "El Zorzal",<sup>8429</sup> y Próspero García, (a) "Flor de Manzanillo",<sup>8430</sup> tergiversaba parcialmente la verdad al manifestar que eran "...tres expresiones puras de la democracia, sin raíces patricias, sin títulos nobiliarios de ninguna clase".<sup>8431</sup> En verdad, no está claro si Roca siempre tuvo mayor consideración por aquellos miembros de la elite que debían su ascenso a sus propios méritos personales, o si en realidad no hizo otra cosa que recurrir al viejo caudillismo.<sup>8432</sup>

Con respecto a Santiago del Estero, la designación de Absalón Rojas como Gobernador, a juzgar por una postrera e interesantísima carta de Félix Santillán (h) a Roca,

"...Santiago se estremeció, y las familias distinguidas huyeron de los bailes y de las diversiones públicas".<sup>8433</sup> Esta reacción de la elite Santiagueña habría ocurrido

"...no porque Rojas no fuese un sujeto bien, quizás mejor que muchos, sino porque las sociedades buscan sus centros y quieren ser gobernadas por personas que dignifiquen a la sociedad culta que es el sensorio de los pueblos civilizados".<sup>8434</sup>

Sin embargo, la elite Santiagueña soportó, a juicio de Santillán,

"...diez años el gobierno de Rojas, pero llevando en el seno de su sociedad un odio profundo a mi querido general, porque se sentía humillada con un mandatario que no le hacía 'aire' (como aquí se dice) ni era de su centro social...Era pardo!".<sup>8435</sup>

Estos odios, aunque imprudentes, según Santillán, "...corren, se agigantan, y llegan empujando pasiones hasta el crimen".<sup>8436</sup>

En Mendoza, Roca "...rompió este aro de hierro [la familia Villanueva] en que tenían envuelta a la provincia", valiéndose del General Rufino Ortega, (a) "El Chanco Colorado", miembro de la llamada "Liga de Beduínos",<sup>8437</sup> quien llevó al gobierno a José Miguel Segura Galdámez,<sup>8438</sup> "...que no era de la familia".<sup>8439</sup> Con respecto a San Juan, a juicio de Nataniel Morcillo, el Gobernador Provisorio Vicente C. Mallea se hallaba, a pesar de su superior capacidad, en las mismas condiciones del Diputado Nacional Juan P. Albarracín, pues "...los sanjuaninos no le perdonan [a Mallea] lo que para mí es el mayor de sus méritos; la humildad de su origen, lo que prueba que su posición actual se la debe a sí mismo".<sup>8440</sup> Y para un tal Luis, quién no puede ser otro que Luis Cané, que le escribía a Roca en marzo de 1884, Mallea "...a quien mucho aprecié, no puede tampoco ser [sucesor de Agustín Gómez en la senaduría nacional], por las grandes resistencias que tiene por su oscuro linaje".<sup>8441</sup> Y con relación a Salta, el candidato a Ministro de Gobierno Carlos Grande,<sup>8442</sup> representaba a las clases más bajas de la población salteña, por cuanto Angel M. Ovejero le confesaba a Roca, que la candidatura de Grande, su primo segundo,

"...todos la repudian como una vergüenza...pero es bueno que Vd. sepa para que juzgue lo que pasa en esta sociedad, que hasta hace ocho años su profesión era comediante en las aldeas de Chile [se entiende los yacimientos de salitre del norte de Chile]".<sup>8443</sup>

Durante la Presidencia de Juárez Celman, el Gobernador Martín Gabriel Güemes le hizo ver reservadamente al Presidente, refiriéndose a los Ortices "...los inconvenientes que traen consigo en un pueblo chico, el monopolio de ciertos puestos nacionales por cuatro hermanos".<sup>8444</sup> Y durante su gestión, la imprenta de El Diario Popular (Salta),<sup>8445</sup> que en el '80 sirviera para sostener la candidatura de Roca, y en 1886 la de Juárez Celman para la presidencia y la de Martín G. Güemes para la gobernación,<sup>8446</sup> fue mandada empastelar por el propio Gobernador aduciendo haberse vuelto opositora.<sup>8447</sup>

Finalmente, en vísperas de la sucesión presidencial de Juárez Celman, los candidatos naturales a la presidencia surgidos de las filas del PAN fueron, a juicio de Matienzo (1928), el propio ex-Presidente Roca, el vicepresidente Pellegrini, y el Director General de Correos Ramón J. Cárcano.<sup>8448</sup> Pero cuando Juárez Celman le otorga el apoyo oficial para la candidatura presidencial a Cárcano, en un acto público donde una selecta juventud muestra su genuflexión, estalla la crisis.

En esta segunda etapa en que gobernó la llamada Generación del 80, que nació con la asunción de Roca, en su primer presidencia, y concluyó con la Revolución del 90, los conflictos se dirimieron principalmente a través de una ruptura violenta con connotaciones de terrorismo de estado (putschs y levas de contingentes) y subsidiariamente a través de la transición pacífica (fraude electoral, negociación internotabiliar y reivindicación eclesiástica).

## Capítulo III-F-25      **Impacto desestabilizador de la Revolución del 90.**

### **Índice**

- Y-I      Tradición historiográfica acerca de la naturaleza revolucionaria del Radicalismo
- Y-II      De la Revolución del Parque (1890) al segundo gobierno de Roca (1898).
- Y-III    Incidencia del Panalismo. El caso de Córdoba.
- Y-IV    Rol del Colegio Electoral. El caso de Tucumán.
- Y-V      Fracaso del Acuerdismo. El caso de Santiago del Estero.

### **Y-I      Tradición historiográfica acerca de la naturaleza revolucionaria del Radicalismo**

La profundización de la crisis del llamado estado oligárquico, y la aparición del Radicalismo en la Argentina de fines del siglo XIX, fue atribuida por algunos historiadores a las desinteligencias entre clanes familiares opuestos. De la extracción social oligárquica de algunos líderes de la Revolución del 90, los nacionalismos argentinos de izquierda y derecha atribuyeron un carácter reaccionario a dicha frustrada revolución. Es decir, haciendo énfasis en la dominación económica, autores como Ramos (1961), aseguraron que la Revolución del 90 no tuvo el aspecto de una lucha social. Más aún, Ramos (1961) intentó desvalorizar una hipotética naturaleza revolucionaria del Radicalismo, y se propuso por el contrario alimentar el mito del carácter nacional-popular del ejército de Roca.<sup>8449</sup> Ramos aseguró que los propósitos revolucionarios de los Radicales no fueron sociales, sino puramente políticos, por cuanto no se proponían sustituir a una clase social por otra, sino por el contrario, consolidar la hegemonía oligárquica de la clase terrateniente.

La Revolución del 90 no tuvo, por lo tanto, para Ramos y otros autores de esa tendencia, el aspecto de una lucha social entre una emergente clase media y una decadente oligarquía patricia. Fiel a esta posición, Ramos (1970) negó que en las provincias interiores hubieran existido oligarquías, reservando esta categoría sólo para las elites centrales del gobierno nacional.<sup>8450</sup> Tampoco vinculó la amenaza obrera y anarquista de comienzos de siglo XX con la pronta legitimación popular del Radicalismo.<sup>8451</sup> En conclusión, para Ramos (1961) y Grondona (1967) la etapa que se inició con la Revolución del 90 es producto de "...una revolución de Buenos Aires contra el interior: una revancha frustrada del Ochenta",<sup>8452</sup> o más aún, una represalia o ajuste de cuentas retrospectivo, tanto del 74 como del 80.<sup>8453</sup> Sin embargo, reducir los orígenes de la frustrada Revolución del 90 a un espíritu de revancha, y sólo con referencia a la Revolución del 80, sería minimizar la cuestión, pues el clima revolucionario, o de shock político,<sup>8454</sup> o sustitución de fracturas, desatado en Buenos Aires por la Revolución del 90, que se extendió como un efecto dominó a lo largo y ancho de todo el país, marcaba

también el fin de una antigua fractura moderna (Liberalismo versus Autonomismo) y el comienzo de una nueva (Radicalismo versus Conservadorismo), y registraba como antecedentes numerosos casos de desajustes o involuciones respecto de las instituciones republicanas, ocurridos durante la primera presidencia de Roca y la consecutiva presidencia de Juárez Celman.

Sin embargo, para Peña (1965), un Marxista de filiación Trotzquista, quien sostuvo el punto de vista opuesto al de Ramos, la frustrada Revolución del 90 expresó un interés puramente defensivo, el de una oligarquía y una burguesía agraria local que intentaba impedir su propia liquidación a manos del gran capital internacional.<sup>8455</sup> Y para una lectura estructuralista (Wright, 1975; y Sábato, 1988), las reiteradas rupturas políticas, violentas o por colapso (golpes de estado), estarían ligadas con las respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico.<sup>8456</sup>

En ese sentido, analizando la naturaleza de las fracturas políticas, para una lectura Olsoniana, reflejada en la tesis de Walt (1987), de la capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de fuerza o debilidad de los partidos políticos, formulada por Sartori (1992); que mide su indispensabilidad y/o capacidad de intimidación, afiliación y movilización, cuanto mayor era la fuerza o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.<sup>8457</sup> Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las amenazas u oposiciones que enfrentaban. A medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por mano propia disuadir o derrotar las amenazas u oposiciones crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza de un partido, su valor como aliado o disuasivo declinaba, incitándolo a formalizar coaliciones.<sup>8458</sup> En la forma o modo en que las fracturas y transiciones políticas tuvieran lugar en la modernidad tardía, se pueden distinguir, según Stepan (1986, 1994), al menos tres modos distintos, los producidos por conexión con la guerra o la intervención extranjera (e.g.: Alemania, Francia, Italia en la segunda pos-guerra Mundial), los inaugurados por las coaliciones autoritarias mismas (e.g.: España y Brasil en la década del 80 del siglo XX), y los iniciados por las propias coaliciones opositoras (e.g.: Nicaragua y Rumania en la década del 80 del siglo XX). Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le corresponde a los sectores opositores reformistas de dicha coalición en alianza con los sectores moderados de la coalición opositora. Pero cuando la transición política es intentada por la coalición opositora, como fue el caso de la Revolución del 90, la ofensiva le corresponde a los sectores radicalizados de dicha coalición.<sup>8459</sup>

Finalmente, para los autores pertenecientes a la escuela de la post-modernidad,<sup>8460</sup> las rupturas o desajustes políticos anti-sistema o transiciones violentas o por colapso (golpes de estado) estarían ligadas a los cambios en las prácticas o estrategias discursivas, las cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruidos en sus elementos constitutivos.<sup>8461</sup> En ese sentido, la frustrada ruptura de 1890 habría constituido lo que Goertz y Diehl (1995) denominan un shock político o sustitución de fracturas, o una revolución fundante, que marcaba el fin de una antigua fractura moderna (Mitrismo o Liberalismo versus Autonomismo o Roquismo) y señalaba el comienzo de una nueva fractura moderna (radicalismo versus anti-radicalismo o conservadorismo). Y el Acuerdo Roca-Mitre habría constituido lo que al tenor de las tesis de Przeworski (1991) se denomina una transición política. Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le corresponde a los sectores reformistas de dicha coalición en concurrencia con los sectores moderados de la coalición opositora.

## **Y-II De la Revolución del Parque (1890) al segundo gobierno de Roca (1898).**

Con la Revolución del 90 tomaba el centro de la escena política un agudo proceso de conflictividad interna o de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, desplazando al fraude y a las imposiciones sucesorias como mecanismos estructurales y privilegiados de acceso al poder. Pareciera ser que en 1890 el Río de la Plata volvió a experimentar un enfrentamiento militar que transformó los grados de asimetría entre el Liberalismo Mitrista (Unión Cívica) y el Autonomismo Roquista posibilitando entre ellos un espacio de negociación. Posteriormente, luego de haberse concretado el Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 1897, se registró una nueva fractura o desajuste eminentemente político, aunque esta vez con un nuevo tercero en discordia: la Unión Cívica Radical.<sup>8462</sup> Pero a diferencia del Acuerdo Mitre-Urquiza (1862), el Acuerdo Roca-Mitre, celebrado en 1891, fue ineficiente pues afianzó una institucionalidad moralmente cuestionada.<sup>8463</sup>

La derrota militar de los sectores radicalizados de la coalición revolucionaria engendró un proceso de deslegitimación del Radicalismo, como partido anti-sistema, y le abrió las puertas del poder a las facciones reformistas de ambas coaliciones, la oficialista (Pellegrini) y la opositora (Mitre), mediante un pacto explícito (Acuerdo Roca-Mitre), lo que vino a resolver la incertidumbre en torno a la incorporación del Mitrismo al nuevo juego electoral. Si bien el Acuerdo Roca-Mitre configuró una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre que generaba la reincorporación del Mitrismo al ruedo político y para fortalecer alrededor de Roca la asimetría necesaria para imponer su hegemonía, no lo fue así para la incorporación del Radicalismo y la consolidación de las instituciones (limpieza del sufragio o sufragio secreto y obligatorio).<sup>8464</sup> La rebelión primero contra el gobierno de Juárez Celman y más luego contra los gobiernos del Acuerdo Roca-Mitre fue el leitmotiv que aunó las voluntades revolucionarias de filiación radical, que incluso llegaron a ser enarboladas en países vecinos como el Brasil y el Uruguay,<sup>8465</sup> y que nos han motivado a formularnos una serie de interrogantes a propósito de las provincias del norte, del oeste y del litoral:

a) ¿guardaron alguna conexión entre sí los golpes de estado ocurridos en Tucumán (1887) y Mendoza (1889), con la Revolución del Parque (1890)?;

y b) ¿Guardó una relación de contagio directo la Revolución del Parque (1890) con los levantamientos radicales de 1893 en Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fé y Corrientes, y con las rupturas, desajustes y crisis políticas provinciales --La Rioja en 1891 y 1898; Catamarca en 1898 y 1899; Tucumán en 1893; Santiago del Estero en 1892 y 1908; San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; San Juan en 1907; y Corrientes en 1893 y 1907?

## **Y-III La incidencia del Panalismo. El caso de Córdoba.**

En Córdoba --provincia perteneciente al subconjunto político del Centro-- la hegemonía se la disputaban en esta etapa el Autonomismo, los Católicos y los Cívicos. En plena postrimería de la Revolución del Parque, y como consecuencia de dicho fenómeno, el Gobernador Marcos Juárez,<sup>8466</sup> --a diferencia de los gobernadores de Buenos Aires,

Julio A. Costa, de Salta Pedro José Frías, de Catamarca José Dulce, de La Rioja Joaquín V. González, de Mendoza Oseas Guiñazú, de San Juan Alejandro Albarracín, de San Luis Mauricio Orellano, de Santa Fé Juan M. Cafferata, de Corrientes Antonio I. Ruiz, o de Entre Ríos Sabá J. Hernández-- no pudo mantenerse en el cargo. Marcos Juárez --a semejanza de lo que sucedió con el Gobernador de Tucumán Silvano Bores, (a) "El Zorzal" y con el Gobernador de Santiago del Estero Maximio Ruiz-- renunció a la gobernación el 20 de agosto y fue reemplazado por el Vice-Gobernador Eleázar Garzón Duarte, (a) "Botón-Bumbula".<sup>8467</sup> Garzón, siguiendo lo aconsejado por Roca, ofreció la conciliación a la Unión Cívica.<sup>8468</sup>

Entre las facciones políticas en que se encontraba dividida la política cordobesa se hallaban amén de los Marquistas o Panalistas,<sup>8469</sup> y de los Taglistas,<sup>8470</sup> los Cívicos Católicos (Agustín Patiño, Nicolás Berrotarán, y Eusebio Agüero), los Cívicos Acuerdistas (Mardoqueo Molina, Julio Fragueiro), los Nacionalistas Astradistas (Vicente Peña, Pedro N. Garzón), los Nacionalistas anti-Marquistas (Seferino Ferreira), los Nacionalistas Revolistas, seguidores del cuñado del Gobernador y ex-Intendente Municipal Luis Revol Núñez (Benjamín Allende, Félix Paz), los Nacionalistas con afinidades Cívicas (José Ignacio Santillán Vélez), y los Nacionalistas anti-Marquistas pero no Astradistas o Revolistas (José del Viso).<sup>8471</sup>

Desde el mismo inicio del gobierno de Garzón, Roca estaba informado por su tío político Felipe Díaz,<sup>8472</sup> de la situación imperante en Córdoba. En carta de Septiembre de 1890, Díaz le prevenía "...que toda esta gente que obedecía ciegamente la consigna de D. Marcos, le hace mucho daño en Córdoba y que Vd. debe tratar y empeñarse formalmente con Garzón y [Benjamín] Domínguez para que desaparezcan completamente".<sup>8473</sup> Haciendo tabla rasa del "Panal",<sup>8474</sup> Díaz entendía que "...todos los buenos Roquistas y mucha parte de la Unión Cívica estaría con nosotros, lo que seguramente importaría un inmenso beneficio para Córdoba y un bien muy grande para su persona".<sup>8475</sup> Doce días después, Díaz insiste ante Roca,

"...que el Panal es lo que a Vd. le hace un terrible daño, porque es esta la gente odiada y aborrecida en Córdoba, y Vd. no debe consentir jamás, que esos hombres manejados por D. Marcos, que hasta se escusaban de saludar a Vd. por haberlo prohibido él, tomen para nada su nombre".<sup>8476</sup>

Díaz creía que él "...no podría jamás figurar a la par de esos hombres manchados, a quienes he combatido y atacado siempre en todas partes, preferiría más bien el retiro absoluto a mi casa antes de aproximarme a esos hombres".<sup>8477</sup> Concluía Díaz,

"...que la desaparición del Panal, sería su principal gloria y su mayor victoria porque aquí se tiene mucha desconfianza al Gobierno creyendo que Garzón y Domínguez, se pueden entender con el Panal".<sup>8478</sup>

La arremetida surtió su efecto, pues Roca escribió al Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,<sup>8479</sup> echándole en cara su afición a los Panalistas, lo cual le exigió a este último una respuesta, donde le aseguraba que

"...El tal Panal ya no existe, y no hay otras posiciones de esa antigua situación que dos: [Juan José] Pitt, en la presidencia del Senado, que renuncia esta noche, y que como te escribí hace tiempo, yo mismo le había pedido su renuncia, y la otra la del Intendente Municipal [Luis Revol]".<sup>8480</sup>

Para el Ministro Domínguez, el desorden se había apoderado de la ciudad de Córdoba y el populacho "...hace lo que quiere y no nos puñalean por la calle porque no se les antoja".<sup>8481</sup> El Gobernador Garzón, suplicaba a la Unión Cívica suspendiera un acto político porque "...no podría evitar que algunos provocadores se mezclaran con los manifestantes, para producir una icatombe [sic] dentro del mismo grupo de la manifestación".<sup>8482</sup> El Jefe de Policía Julio Astrada,<sup>8483</sup> era para Domínguez

"...sospechoso en cuanto lo sentíamos dispuesto a facilitar ese desorden y no era posible poner a los comisarios y soldados en tales circunstancias un nuevo Jefe".<sup>8484</sup>

Un mes más tarde, la Policía estaba, según el Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez, totalmente desmoralizada, pues mientras ella era la única sujeta a prescripciones de orden,

"...no hay del populacho ni un solo herido, de nuestros gendarmes todos los días mandábamos al hospital, habiendo día que hemos enviado cinco heridos y algunos de gran gravedad, de modo que para protegerlos ha sido preciso ordenarlos en patrulla [sic]".<sup>8485</sup>

Con un partido mucho más poderoso a nivel nacional y provincial, Domínguez le recordaba a Roca que, para contentar a los "anarquistas [radicalizados] de nuestro bando",<sup>8486</sup> el Autonomismo disponía para ofrecer en ese entonces los siguientes incentivos selectivos (puestos):

"...Un Gobernador, dos ministros, un Senador al Congreso, ocho diputaciones, un Jefe de Policía, y otros de menor cuantía, como en la Legislatura Provincial, Juzgados y Banco, a más de la Intendencia Municipal".<sup>8487</sup>

A juicio de Diego Chapeaurouge Graham,<sup>8488</sup> los Cívicos y los Católicos no podían entenderse entre sí. A pesar de su Comité, "...cada grupo tiene su club y candidatos y no se unen al Comité Central sino con condiciones".<sup>8489</sup> Chapeaurouge sabía por boca del periodista Ignacio Vélez,<sup>8490</sup> "...que anoche surgió un nuevo Club Cívico de [Lucrecio] Román, el Clérigo [Eleodoro] Fierro y Miguel Angel Angulo y García, proponiendo unirse al Civismo mediante concesiones".<sup>8491</sup>

La conciliación con la Unión Cívica, a posteriori del Acuerdo Roca-Mitre, fue iniciada en Córdoba por el Jefe de Policía Julio Astrada, valiéndose del periodista gallego José Rodríguez del Busto,<sup>8492</sup> que a juicio del ex-Ministro de Gobierno Felipe Díaz era "...el peor elemento que puede buscar con ese fin, pues es bien conocido el pésimo concepto que debe a este pueblo".<sup>8493</sup> La facción partidaria denominada los Palomas Blancas, era operada por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo",<sup>8494</sup> quien en 1892 asume la gobernación contando con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, Ángel Machado,<sup>8495</sup> y Alejandro Vieyra,<sup>8496</sup> que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,

"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel y amagan revolución".<sup>8497</sup>

Pero en la Unión Cívica, que "...no es numerosa, ni tiene composición compacta", y donde dominan los clericales, "...al punto tal que ayer el artículo de El Porvenir (Córdoba) decía que ellos trabajaban en política siguiendo las inspiraciones de León XIII",<sup>8498</sup> prevalece la opinión de restar colaboración al régimen del Acuerdo, colaboración que consistía en aceptar los incentivos selectivos ofrecidos por el régimen gobernante, es decir integrar con ellos listas comunes.<sup>8499</sup> En Diciembre de 1892, los entretelones de una elección municipal, donde el radicalismo fué derrotado mediante el fraude, provocaron, merced a los ataques de los diarios La Libertad,<sup>8500</sup> Sol de Mayo,<sup>8501</sup> y El Porvenir,<sup>8502</sup> la caída del Ministro de Gobierno Dr. Nicolás Manuel Berrotarán Garzón, y éste arrastró en su caída al Gobernador Manuel Dídimo Pizarro.<sup>8503</sup>

En cuanto a la situación financiera, a fines del aciago año de 1890, Diego Chapeaurouge le denunciaba a Roca que "...si son ciertos la mitad de los cargos [acusaciones] al Banco, hay para un proceso".<sup>8504</sup> Pero asimismo le aclaraba a Roca, que el Directorio de ese entonces "...tomó el esqueleto del Banco y casi no ha prestado nada", siendo los responsables del desquicio financiero los directores anteriores (Juan José Pitt, Julio Astrada, Santiago Díaz, Aranda y otros).<sup>8505</sup> En ese sentido, el Síndico del Banco de Córdoba, José Rodríguez del Busto, nombrado por el Gobernador Marcos Juárez, a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,

"...emplearía su puesto en beneficio de la política y contra toda la circunspección que debe tenerse en tales puestos, llevando como ya lo ha hecho al conocimiento del público el estado de los negocios particulares de las personas que no le son afectas".<sup>8506</sup>

El Ministro de Gobierno Domínguez intentaba justificar el despilfarro denunciándole a Roca que

"...entre los Cívicos está el mayor número de quebrados y es a los que menos conviene que se abra el Banco; y no creas que esto es farsa; los amigos de Marcos [Juárez], si bien abusaron del crédito, ganaron también mucho en sus negocios, mientras que los otros abusaron también y no ganaron".<sup>8507</sup>

Frente a la negativa de los Cívicos de aceptar incentivo alguno (cargos públicos), el ex-Ministro de Gobierno Felipe Díaz, que propugnaba un progresivo copamiento de la administración pública, le escribe a Roca para notificarle que a los principales miembros de la Unión Cívica que vinieron a pedirle que no aceptara el puesto de Director del Banco Provincial, les manifestó:

"...a mi juicio han debido y debían proceder por aceptar los puestos que el Gobierno les ofrecía, que esa era la manera de ir ascendiendo por grados hasta llegar a apoderarse de la situación de Córdoba".<sup>8508</sup>

Esa actitud de rechazo a los incentivos selectivos (cargos públicos), coherente con su posterior política de abstención revolucionaria (boicot electoral) es confirmada por una carta de Benjamín Domínguez, fechada dos días después, en la que le informa que la vocinglería desatada por el hecho de haberse nombrado sólo Roquistas para el Directorio del Banco, obedecía a que

"...se ofrece el puesto a los Cívicos y no lo aceptan; no se quiere nombrar a los Juaristas, entónces no queda mas que los Roquistas, fracción del partido nacional,

que por ser de más dignidad resistió las influencias de los Juárez, y tuvo bastante decisión en su partido para no pasarse al enemigo".<sup>8509</sup>

Para comienzos de 1892, el Jefe del partido Nacionalista Julio Astrada volvió a valerse de "...la Presidencia del Banco".<sup>8510</sup>

#### **Y-IV El rol del Colegio Electoral. El caso de Tucumán.**

En Tucumán --correspondiente al subconjunto político del Norte-- la primacía política se la disputaban el Autonomismo y los Cívicos. El Gobernador Interino de Tucumán Silvano Bores, (a) "El Zorzal",<sup>8511</sup> --a diferencia de los gobernadores de Salta, de Catamarca, de La Rioja, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de Santa Fé, de Corrientes, o de Entre Ríos-- no pudo sostenerse en el mando. Sin embargo, Bores resistió el asedio opositor casi cuarenta días. Este corto período transcurrió en medio de prisiones de opositores y rumores de revuelta casi diarios.<sup>8512</sup> Finalmente, tres meses después de producido en Buenos Aires el conocido fenómeno revolucionario de Julio del 90, y más de un mes después de caído el Gobernador de Córdoba Marcos Juárez, más precisamente el 5 de octubre, los partidos políticos Tucumanos llegaron a un acuerdo para separar a Bores y designar en su reemplazo a Próspero García (a) "Flor de Manzanillo".<sup>8513</sup>

Fruto de una improvisada conciliación entre las fuerzas Mitristas y Roquistas fue también la elección de su Ministro de Hacienda, Benjamín Aráoz y Ormaechea.<sup>8514</sup> Unos meses después, a mediados de 1891, cuando se trató de renovar el Colegio Electoral y las Cámaras Legislativas, García se propuso demostrar con hechos "...que no se proponía estrechar el círculo, como se decía, sino dar la mayor participación posible a las diversas fracciones que componen el partido liberal".<sup>8515</sup> Entre las facciones políticas en que se encontraba dividida la política tucumana se hallaban los Roquistas, los Mitristas Prosperistas,<sup>8516</sup> los Liberales Históricos o Padillistas, los Radicales y los Medinistas.<sup>8517</sup> Las listas de candidatos para el Colegio Electoral y la Legislatura se hicieron con Padillistas y gubernistas correspondiendo la mitad de los incentivos selectivos a cada una de las agrupaciones políticas.<sup>8518</sup> A juicio del ex-Senador Provincial por Córdoba y futuro Senador Nacional José Vicente de Olmos,<sup>8519</sup> los Padilla no se sintieron satisfechos con que el Gobernador Próspero García los dejara elegir como Síndico del Banco Provincial "...a quien quisieren", ni con que se les acordara "...repetidos plazos para el pago de sumas hasta insignificantes, por Contribución Directa y Patentes", ni con que el Gobierno evitara "...que el Banco les cobre hasta ahora sus deudas".<sup>8520</sup> Pero no todas las facciones del partido liberal quedaron conformes con la repartija de sinecuras. De la exclusión de los Boristas sobrevino un enojo de Bores, quien contaba todavía "...con cuatro votos en la Legislatura y veinte en el Colegio Electoral, con Alurralde y los Padilla".<sup>8521</sup> Como consecuencia del Acuerdo Roca-Mitre,<sup>8522</sup> el partido Autonomista de Tucumán estaba, a juicio del famoso periodista León Rosenvald,

"...hecho pedazos y dividido como siempre en tres fracciones. Son muchos los jefes y muy pocos los soldados. Los unos son Mitristas, los otros ya empezaron a hacer resucitar a Rocha, y los demás de la fracción Bores son nadistas [sic] y sólo esperan el sol que más calienta para agarrarse de la cola".<sup>8523</sup>

Para fines de 1892, Bores se auto-exilió en el paraje de La Invernada, "...lugar solitario y desierto, punto intermedio de La Cocha y Villa Alberdi, donde la autoridad policial no es conocida ni de vista".<sup>8524</sup>

Para comienzos de 1893 el Colegio Electoral estaba compuesto por distintos elementos, elegidos en los gobiernos de Lídoro Quinteros (1888-90) y de Bores (1890), y bajo el auspicio del gobierno de García, pero ninguno de los partidos militantes tenía mayoría en él, y mucho menos tenía el quórum para el acto de la elección. Próximo a reunirse el Colegio Electoral, en marzo de 1893, Don Próspero García, bajo el influjo del Intendente de Policía Don David Posse Zavalía,<sup>8525</sup> había hecho circular reservadamente una invitación al Colegio Electoral, "...pero tan sólo dirigida a los suyos, y a los que creían o pensaban que estarían con ellos".<sup>8526</sup> Pero habiendo los demás Electores apercibídose de la convocatoria clandestina,

"...se han presentado y como el Intendente o ellos se vieran perdidos porque además de descubrirse el pastel, se han encontrado con una mayoría abrumadora, han tratado de hacer obstrucción, evitando que el Colegio Electoral se constituya".<sup>8527</sup>

Para ello, el Intendente David Posse ordenó al portero de la Legislatura cerrar las puertas de la misma, al extremo que cuando se le ordenó que las abriera, se presentó Posse "...dando gritos, ordena al portero que no abra las puertas y profiere amenazas a alguno de los Electores".<sup>8528</sup>

La lucha por los Electores en Tucumán se perpetuó por un largo tiempo.<sup>8529</sup> Esta política del Gobernador Próspero García, con sus consiguientes atropellos, provocó como reacción un movimiento de opinión en favor del Roquismo, en la persona de Don Benjamín Aráoz. Con el fin de destruir a Aráoz y sus amigos Roquistas,<sup>8530</sup> García lanzó la candidatura para Gobernador de Wellinton Rosa,<sup>8531</sup> cuñado de Don Benjamín Aráoz, con el propósito de poner al uno frente al otro, y así pretender

"...que Aráoz se suprimiese a sí mismo, antes que luchar contra el amigo y cuñado, consiguiendo así anular la manifiesta inclinación de los mismos Mitristas que ven en Aráoz la victoria segura y la única solución conveniente a sus intereses locales, y también las de las corrientes populares, hasta hoy claramente pronunciadas en su favor".<sup>8532</sup>

Aparte de reunir más votos Situacionistas en el Colegio Electoral, la candidatura de Rosa tenía la ventaja "...de ser hermano político de Aráoz, lo que vendría a coartar la libertad de éste y muchos de sus amigos".<sup>8533</sup> Wellinton no podía declinar su candidatura, "...porque el Dr. García y sus Mitristas se limitaban a hacer circular sordamente su nombre, sin producir un acto de partido".<sup>8534</sup> Y cuando a comienzos de Junio de 1893 una comisión llevó la candidatura de Rosa a la Campaña, y recién entonces Wellinton declinó formalmente la proclamación de su candidatura,<sup>8535</sup> se reunió alrededor del renunciante Ministro Aráoz "...casi la totalidad de los elementos gubernistas del Colegio, aparte de los de la oposición, que teníamos con nosotros".<sup>8536</sup>

Vencido entonces García por adelantado, éste comenzó a trabajar con el sólo fin de obstruir la reunión del Colegio Electoral "...confiando con ganar las elecciones del 2 de Julio próximo e incorporar quince nuevos electores, para cuyo efecto prepara también todos los medios de fuerza de su policía brava".<sup>8537</sup> Asimismo, aún después de la

declinación de Rosa, García levantó el mismo mes de Junio la candidatura del Senador Provincial Alfredo Guzmán,<sup>8538</sup> la cual duró tres días, y el 18 de Junio la candidatura del Dr. Rufino Cossio Gramajo,<sup>8539</sup> "...persona también estimable, pero que además de ser imposible por su carácter Mitrista, lo es absolutamente [imposible] por sus vinculaciones con los titulados Mazhorqueros [Bernardistas o Irigoyenistas]".<sup>8540</sup> La composición del Colegio Electoral no aceptaba ni toleraba, "...candidatos con estas filiaciones".<sup>8541</sup> Pero una vez efectuada la elección en el primer domingo del mes de Julio de 1893, donde se votaba la tercera parte de los electores faltantes, el 15 de Agosto García no constituyó el Colegio Electoral tal como lo establecía la Constitución Provincial, postergándose ese acto para el 31 de agosto, mes en el cual podía "...llevarse la pelada", debido a que se habría dado tiempo "...para que entren los elegidos en Julio y cesen los que fueron elegidos en 1890, casi todos enemigos de la situación".<sup>8542</sup> Entonces, al incorporarse los nuevos electores, y conminar mediante la fuerza pública a los electores opositores, que faltaban para formar quórum; en la madrugada del 3 de septiembre de 1893, el Colegio eligió Gobernador al tan llevado y traído candidato oficialista Wellington de la Rosa.<sup>8543</sup>

En vista de la burda maniobra de García, que hacía recordar los motivos por los cuales fue propuesta en 1877 la intervención de Salta, el 7 de septiembre de 1893 se produjo una insurrección Radical, que provocó el envío del regimiento 11 de Línea con instrucciones de no intervenir en el conflicto.<sup>8544</sup> Sin embargo, la participación de las tropas en la represión trajo consigo su propia anarquía y división. Cuando su Jefe, el Riojano Coronel Ramón Bravo,<sup>8545</sup> comenzó a ayudar a las tropas de García, la oficialidad del 11 de Línea, que simpatizaba con el Radicalismo, se sublevó el 20 de septiembre, pasándose a la Revolución, determinando con ello la capitulación y prisión de García, y la constitución de un gobierno revolucionario.<sup>8546</sup> Esto último, fué lo que decidió que el Gobierno Federal enviara las fuerzas al mando del General Francisco B. Bosch,<sup>8547</sup> quien había participado de la represión en la ciudad de La Plata en el mes de Agosto, con la presencia del ex-Presidente Carlos Pellegrini, las cuales liberaron al Gobernador García e impusieron un Gobierno militar provisorio. Para ese entonces, Benjamín Aráoz le advertía a Roca que para impresionar o agitar los espíritus opositores se "...ha formado una verdadera conspiración entre tres corresponsales de diarios de la capital".<sup>8548</sup> Ellos eran: León Rosenwald, de La Prensa;<sup>8549</sup> Gaspar Taboada, de La Nación;<sup>8550</sup> y las veces que éste último se ausentaba, lo reemplazaba el hijo mayor del Dr. Próspero García, "...una alimaña que vive despechada y rabiosa"; y Antonino Lascano, de El Diario.<sup>8551</sup> Entre estos tres corresponsales, Aráoz denunció que

"...han formado el complot de transmitir a diario una invención, una mentira, a veces graves calumnias contra el gobierno de esta provincia, convencidos que así, con la gota constante, se forma mala atmósfera al mejor gobierno, y con doble facilidad al modestísimo que hoy tiene Tucumán".<sup>8552</sup>

Finalmente, el gobierno militar provisorio derivó en la gobernación del Dr. Benjamín Aráoz.<sup>8553</sup> Se sabe que el Dr. Aráoz murió mientras ejercía el mando, durante el acto público realizado al recibirse los restos de su pariente el Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid. Esta fue una situación inesperada, "...una sorpresa de la fatalidad que tomaba a los partidos desprevenidos y en condiciones anormales para organizarse".<sup>8554</sup> Pero el Partido Nacional y la Unión Cívica persistieron en su acuerdo y de esa conjunción de opiniones surgió electo, Lucas Córdoba, (a) "Barba y Chivo".<sup>8555</sup>

## Y-V Un fracaso del Acuerdismo. El caso de Santiago del Estero.

A diferencia de Salta, donde prevalecieron los juegos de salón, tanto en Santiago del Estero como en San Luis, Córdoba, Catamarca y Santa Fé se habían ensayado en la década del 90 diversos conatos revolucionarios.<sup>8556</sup> En Santiago del Estero --provincia perteneciente al subsistema político del Norte-- el predominio político lo disputaban en el período que aquí estudiamos diversas fuerzas: el Autonomismo, los Cívicos, el Taboadismo o Gorostiaguismo y el Modernismo. El Gobernador Maximio Ruiz Alvarado,<sup>8557</sup> --al igual que los Gobernadores de Córdoba y Tucumán-- no pudo esquivar la tormenta producida por la Revolución de Julio. El Gobernador Ruiz fue destituido por un piquete policial aparentemente a las órdenes del político Pedro García y detenido en el Cabildo. Pero sendas reuniones hechas por Pellegrini con conspicuos políticos Santiagueños hicieron volver las cosas a sus inicios y Ruiz pudo recobrar el mando.<sup>8558</sup> A posteriori de los hechos del 90, el Club Libertad, centro del Rojismo (facción política Autonomista, seguidora del Gobernador Absalón Rojas), sufrió una profunda reorganización. A dicho movimiento se adhirieron Gregorio Santillán,<sup>8559</sup> y Francisco "Pancho" Olivera,<sup>8560</sup> "...y otros más de importancia discutible".<sup>8561</sup> Tal adhesión, a juzgar por el Diputado Nacional Cayetano Carbonell,<sup>8562</sup> no era sólida, "...y los unos a los otros se miran de reojo y con más desconfianza de la que existía antes de la caída del Dr. Juárez entre sus amigos y los de ese mandatario".<sup>8563</sup> La razón de esta desconfianza se encontraba "...en lo reducido del teatro en que tantas aspiraciones encontradas se desenvuelven chocándose entre sí".<sup>8564</sup> En la distribución de los cargos públicos, los gobernantes daban importancia, según José Antonio Vieyra,<sup>8565</sup> "...al número de miembros familiares, entrando hasta en ligas inmorales y perniciosas a los intereses de la provincia y de la nación".<sup>8566</sup> Cuando los Gorostiaguistas, compuestos por los ex-Taboadistas, en franco proceso de relegitimación, exigieron en Noviembre de 1890 el cambio del Ministro de Gobierno, el Ministerio pasó de manos de un cuñado de Absalón Rojas (el Diputado Octavio Sosa), a las de otro cuñado de Gorostiaga, con el inconveniente de que el Gobernador Maximio Ruiz se violentó "...por el antecedente de que a Sosa lo hizo renunciar su puesto de Diputado al Congreso pidiéndole lo acompañase como Ministro".<sup>8567</sup> Al año, José Antonio Vieyra en carta a Roca, le refería que

"...después de la caída de un Ruiz (Gobernador Maximio Ruiz Alvarado) y otro Ruiz (Jefe de Policía) y con la disparada y la inacción de los demás Ruizes (empleados) ha venido la elección de un Diputado a la Legislatura, en un Departamento donde el Comandante, Juez de Paz, y Comisario eran tres Ruizes cuñados del Gobernador y primos hermanos".<sup>8568</sup>

Cuando se produjo la elección, en 1891, al ir los opositores, y temerse desórdenes,

"...no han allado otra persona más capaz para mandarla en comisión, que a otro Ruiz, hermano del Gobernador [Maximio Ruiz], llamado Vicente, un pobre hombre, buen padre de familia, pero muy infeliz a cabal, dicen que buscaban su prudencia...lo que han buscado para mí es, dar bombo al Ruizismo, aunque al Estado se lo lleve Mandinga".<sup>8569</sup>

Al año siguiente, en 1892, y a los diez días de haber asumido Absalón Rojas,<sup>8570</sup> por segunda vez la gobernación, Cívicos y Modernistas, entre ellos el ex-Diputado Nacional Manuel Gorostiaga,<sup>8571</sup> produjeron un desajuste o ruptura política, es decir una violenta transición, al tomar por asalto la Casa de Gobierno y reducir a Rojas a prisión. Ello provocó un célebre debate en la Cámara de Diputados de la Nación, con la participación de

Oswaldo Magnasco, y una nueva intervención, designada por el Ministro del Interior Manuel Quintana, a cargo del Comisionado Dr. Eduardo Costa y del Jefe de las tropas Gral. Amaro Arias.<sup>8572</sup> Y al presentar Rojas su diploma al Senado Nacional, el Senador Mariano Varela lo impugnó por haber Rojas

"...pasado su vida pública yendo del gobierno a la banca de senador y de esta al gobierno, hasta que un buen día, cansado el pueblo hizo una revolución".<sup>8573</sup>

Convocadas nuevas elecciones, triunfó la Unión Provincial, una coalición de Cívicos y Modernistas, la que eligió como sucesor de Rojas al Dr. Gelasio Lagar Contreras.<sup>8574</sup> Esta elección provocó en Santiago del Estero la reacción de los Ruices, que lo boicotearon a todo lo largo de su gestión,<sup>8575</sup> y en el gobierno nacional la quiebra del gabinete obligando a renunciar al Ministro del Interior Manuel Quintana, el que había propiciado la intervención federal.<sup>8576</sup> Y tres años después, en 1895, con el Partido Autonomista Nacional (PAN) fragmentado en siete facciones, los mismos vicios de siempre se repetían, pero multiplicados por siete, pues el Jefe de Policía y el Ministro de Gobierno, inspirados por el Senador Nacional Pedro García, coaligado con Gorostiaga y confabulado con un movimiento Cívico-Nacional con apoyo Radical, derrocaron al Gobernador Lagar e impidieron que la Legislatura se reuniera provocando una nueva intervención federal a cargo del Dr. Julián Aguirre.<sup>8577</sup> Cuando en 1895, se estaba por decidir que la sucesión del Gobernador Lagar recayera en Adolfo Ruiz y no en Pedro Olaechea y Alcorta,<sup>8578</sup> como se había convenido originalmente, Félix Santillán (h) lo regañaba a Roca, indicándole que buscara como candidatos

"...los hombres que satisfagan al pueblo, y a Vd. también. No los busque entre aquellos que flotan en la superficie que siempre lo mejor se encuentra oculto en el fondo de las sociedades".<sup>8579</sup>

Le hacía ver también que debió haber exigido para Gobernador o Vice alguna persona del círculo revolucionario o a "...personas más allegadas a ellos, y no dar al traste con todos, entregando el gobierno ad licitum, sin miramiento alguno a los que debían ser considerados".<sup>8580</sup> Ello era para Santillán "...un escándalo que no hay necesidad darlo General".<sup>8581</sup> Sin hacer alarde de Roquismo, había según Santillán, "...hombres más cabales que pueden servir tanto o mejor su política con satisfacción de amigos y enemigos".<sup>8582</sup> Allí estaban, según Santillán,

"...el Dr. [Carlos] Coronel (pero desgraciadamente es pardo, no les ha de gustar por igual motivo que Rojas: y ya he dicho no hay que martirizar a los pueblos) cuyas condiciones morales son buenas".<sup>8583</sup>

Estaban también

"...[Remigio] Carol,<sup>8584</sup> que sería más popular que [Adolfo] Ruiz.<sup>8585</sup> Francisco Aliaga,<sup>8586</sup> que por sus altas prendas sería lazo de unión para todos y como Gobernador o vice-Gobernador, conciliaría cualquier dificultad. Eudoro Gallo,<sup>8587</sup> que tanto ha trabajado en este contraste muy justo sería también que se le diese la vice-gobernación. El Dr. [Dámaso E.] Palacio,<sup>8588</sup> aunque antiguo radical también es simpática su personalidad. El Dr. [Pedro] Olaechea,<sup>8589</sup> personaje muy saliente por sus cualidades sobre manera recomendables".<sup>8590</sup>

Entre esta gente decente, le pedía Santillán al Gral. Roca, que eligiera alguno para la Gobernación o Vice-Gobernación, "...al que satisfaga más al común de los círculos políticos".<sup>8591</sup> Pero elegir dos candidatos de idéntica filiación y tinte, era para Santillán "...un acto cruel y desacertado".<sup>8592</sup>

Por último, el Interventor Aguirre convocó a elecciones entregando el mando en enero de 1896 a Adolfo Ruiz.<sup>8593</sup> Su mandato estuvo conmocionado por el asesinato del Diputado Nacional Pedro García --quien conspiraba contra el gobierno de Ruiz-- que estremeció al país a semejanza del crimen del Senador Sanjuanino Agustín Gómez, cometido diez años antes.<sup>8594</sup> Como uno de los que querían derrocar al gobierno de Ruiz estaba el Director del diario La Unión Cívica (Santiago del Estero) y más luego Senador Nacional y caudillo provincial Francisco Castañeda Vega, quien "...fue encarcelado junto con los representantes de los grandes diarios de la capital y muchas distinguidas personas de aquella provincia".<sup>8595</sup>

En esta tercer etapa en que gobernó la denominada Generación del 80, tanto en el norte, con excepción de Salta, como en el Litoral, los conflictos se volvieron a dirimir intermitentemente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente a través de la transición pacífica (sufragio secreto y obligatorio, pactos y negociación inter-notabiliar).

### Capítulo III-F-26.- **Ruptura del Acuerdo e interna del Autonomismo (P.A.N.)**

#### **Índice**

- Z-I Sedición permanente. El caso de Santiago del Estero.
- Z-II Lucha de clanes intra-oligárquica. El caso de Salta.
- Z-III Rol político de un censo demográfico. El caso de Tucumán.
- Z-IV Nepotismo desatado. El caso de Catamarca.
- Z-V Intervención federal. El caso de La Rioja.
- Z-VI Arbitraje de terceros. Los casos de Cuyo.
- Z-VII Persistencia de la fractura geográfica. El caso de Santa Fé.
- Z-VIII Otra intervención federal. El caso de Corrientes.
- Z-IX.- Dilemas de las opciones estratégicas.

#### **Introducción del capítulo III-F-26**

Al tenor de las tesis de Przeworski (1991), cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa continuista le corresponde a los sectores reformistas de dicha coalición en concurrencia con los sectores moderados de la coalición opositora. Este fue el caso cuando se produjo la crisis de sucesión de la presidencia de José Evaristo Urriburu y la consiguiente reelección o porfirización de Roca. Destruído el Acuerdo Roca-Mitre, que prevaleció durante la presidencia de Luis Sáenz Peña (1892-96), entró a jugar la llamada política de las paralelas, consistente en una estrategia concurrencista que debía traducir "...no una actitud de protesta sino una actitud de disidencia", que se manifestaba en la alianza de los Cívicos Nacionales o Mitristas con los Radicales Bernardistas (mazorqueros o Irigoyenistas o Derquistas) contra el P.A.N..<sup>8596</sup> A esta estrategia

concurrencista se opuso la fracción intransigente o hipolitista, seguidora de Hipólito Yrigoyen, dividiéndose con ello la Unión Cívica Radical, y dando lugar al nuevo triunfo de Roca.<sup>8597</sup>

## **Z-I La sedición permanente. El caso de Santiago del Estero.**

Asediado por los Pellegrinistas, el Gobernador Adolfo Ruiz, le negó a Roca en 1898 que fuera suya la paternidad de la candidatura a Gobernador de su tío carnal Maximio Ruiz, sino que por el contrario "...la he rechazado cuando [el Diputado Nacional Melitón] Bruchmann la ha propuesto asegurando contaba con las simpatías de V."<sup>8598</sup> Como resultado de dicha impugnación, es designado Gobernador el ex-Diputado Nacional Dámaso E. Palacio,<sup>8599</sup> quien desempeñó el cargo hasta 1901, año en el que se lo eligió como Senador Nacional por nueve (9) años.<sup>8600</sup> Palacio fue sustituido por Pedro S. Barraza,<sup>8601</sup> a quien lo sucedió a su vez, en Octubre de 1902, José D. Santillán.<sup>8602</sup> Finalmente, durante el gobierno de este último, se sucedieron varias tentativas de revolución. En 1905, la sublevación Radical fue encabezada por el ex-Senador Provincial y más luego Ministro del Interior Dr. Ramón Gómez y por el ex-Diputado Nacional Dámaso Giménez Beltrán y "...algunos otros que fueron encarcelados y cuya defensa hizo el actual Senador Dr. Pedro Llanos".<sup>8603</sup> Tres años más tarde, el 24 de Abril de 1908, el país conoció el caso del secuestro del Gobernador José Domingo Santillán Gondra y la muerte en la casa de gobierno de su hermano Mariano, electo Diputado Nacional.<sup>8604</sup> Como consecuencia de ello, Palacio volvió al gobierno de la provincia, luego de renunciar al Senado, cargo en el cual perduró hasta el año del centenario.<sup>8605</sup>

## **Z-II Lucha de clanes intra-oligárquica. El caso de Salta.**

En Salta, las luchas políticas se personificaron entre el clan de los Ovejero y el viejo clan de los Ortiz, aquel que había luchado contra el más antiguo clan de los Uriburu.<sup>8606</sup> El Gobernador David Ovejero Zerda (1904-06),<sup>8607</sup> se impuso a sí mismo como Senador Nacional y pretendió imponer, no se sabe si en broma o en serio,<sup>8608</sup> como Gobernador primero a su suegro Francisco J. Ortiz, y cuando este último fracasó trató de imponer a Luis Linares Usandivaras.<sup>8609</sup>

El responsable de enfrentar a los Ovejero fue primero un miembro de la misma familia, el ex-Diputado Dr. Ángel M. Ovejero, (a) "submarino".<sup>8610</sup> Este ex-Diputado Ovejero había logrado penetrar en la mayoría legislativa que regenteaba Ortiz.<sup>8611</sup> Más luego enfrentó al Gobernador Ovejero un joven político y empresario, con fuertes dotes personales que le sirvieron para forjarse una imagen de pionero o "self made man", llamado Robustiano Patrón Costas, (a) "Gata Polveada".<sup>8612</sup> Cuando en 1906, enfrentó al Gobernador David Ovejero Zerda (1904-06), contaba sólo con 26 años de edad, y ya había sido Ministro de Hacienda de Ángel Zerda Medina.<sup>8613</sup> Finalmente, el Gobernador Ovejero abdicó el mando. Sin embargo, esta actitud no era gratuita.<sup>8614</sup>

En la postulación del candidato a gobernador, la selección del candidato a Diputado Nacional jugaba un rol crucial. Si el Dr. Ignacio Ortiz,<sup>8615</sup> era proclamado candidato, "...no quedaría para el futuro gobierno sino el nombre del Dr. Linares".<sup>8616</sup> Los partidarios de Linares, "...que son muy numerosos, trabajan para inclinar a la mayoría hacia el Dr. Ortiz, cuya diputación les alejaría el peligro de un adversario que cuenta bastantes

elementos".<sup>8617</sup> Por el contrario, los seguidores del Dr. Ortiz, "...tratan de evitar que este acepte la diputación para jugar la partida en las elecciones de Gobernador".<sup>8618</sup> Para evitar la candidatura de Linares, Patrón Costas propiciaba la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola,<sup>8619</sup> bajo la divisa de la Unión Popular.<sup>8620</sup> Finalmente, Ortiz aceptó la diputación y Linares se quedó con la gobernación.

En aquellas luchas políticas Patrón Costas llegó a decir refiriéndose al Vice-Gobernador y Presidente de la Cámara de Senadores Don Ángel Zerda, a su sobrino segundo el Gobernador David Ovejero Zerda, y al candidato a Gobernador Don Luis Linares Usandivaras que "...una familia se ha adueñado del poder y ha ocupado todas las posiciones de alguna importancia".<sup>8621</sup> Los que inspiraban las resoluciones gubernamentales no eran, según Patrón Costas, ni un partido ni un hombre, sino "...los intereses de la familia [Ovejero Zerda] o las conveniencias particulares de cada uno de sus miembros".<sup>8622</sup> Seguía denunciando Don Robustiano que

"...convertida la Provincia en feudo y convencidos de que espigaban en campo propio, han cerrado sus filas y por eso es que hoy en la contienda solo pueden presentar sus legiones de magistrados, funcionarios de policías y coroneles de campaña".<sup>8623</sup>

A tal extremo llegaba la falsía y la deslealtad del régimen imperante que Patrón continuaba afirmando

"...se llega a declarar por el órgano oficial que los empleados públicos tienen el deber y la obligación de sostener al gobierno porque 'deben estar con el amo que les da de comer'".<sup>8624</sup>

Dos semanas más tarde un numeroso grupo de ciudadanos salteños,<sup>8625</sup> aunando sus quejas a las proferidas por Patrón Costas, denunciaban en Buenos Aires al Ministro del Interior que el Gobierno de la provincia de Salta perseguía el propósito de suprimir el derecho del sufragio y "...substituirlo por la voluntad caprichosa e ilegal del círculo gobernante, compuesto en su inmensa mayoría por los miembros de una sola familia".<sup>8626</sup>

En 1908, cuando el ex-Rochista Pío Uriburu fué a Salta con la candidatura de Robustiano Patrón Costas, consiguió que el grupo gubernista se dividiera

"...con nuestro amigo Ángel Zerda a la cabeza, grupo que se declaró decidido opositor al candidato Dr. Santiago López, Ministro de Gobierno, y consentido sino apoyado por el Gobernador Linares".<sup>8627</sup>

El Gobernador Luis Linares Usandivaras para evitar la división de su partido "...vióse en la necesidad de pedirle a su Ministro que desistiera de sus trabajos y retirara su candidatura".<sup>8628</sup> Logrado su propósito, Linares propuso al Diputado Nacional Dr. Marcos Alsina,<sup>8629</sup> lo cual fue peor que la candidatura de López, pues Alsina "...representaba entregar esta Provincia a la influencia del Presidente [Figuerola Alcorta] y elevar a un hombre de malos antecedentes propios y de oscura familia".<sup>8630</sup>

Para combatir esta situación se formó en Salta bajo el liderazgo del Dr. Robustiano Patrón Costas la Unión Provincial, que según el Diputado Nacional por Santa Fé Rogelio Araya "...congregó en su seno al pueblo todo de la provincia de Salta, y fue entonces que se produjo la minuta de comunicación del Dr. [José Evaristo] Uriburu pidiendo la

intervención de la provincia".<sup>8631</sup> Como el Congreso no despachó la solicitud del Poder Ejecutivo, el Dr. Linares, fue electo Gobernador, y el partido Unión Popular, que proclamó la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola, "...no pudo ni siquiera llegar a los comicios".<sup>8632</sup> Para seguir la costumbre, el consagrado Gobernador Dr. Linares, cuando culminó su mandato "...transmitió el poder a un tercer sobrino [Avelino Figueroa Ovejero]".<sup>8633</sup> Este último intento, fue denunciado por el Dr. Abrahám Echazú,<sup>8634</sup> para quien "...esto es ya un exceso, que es contrario a la índole republicana de gobierno, que una sola familia se perpetúe en el mando".<sup>8635</sup> Y cuando le preguntaron a que atribuía la tenacidad de los Señores Ovejero y Zerda por conservar el gobierno de su provincia, Echazú contestó que: "...el gobierno les proporciona honores y dinero. Ellos tienen un gran ingenio azucarero, y dueños de la situación de Salta y Jujuy, los impuestos son suaves, las peonadas se consiguen más fácilmente y todo marcha a maravilla".<sup>8636</sup>

En realidad, la denuncia de Patrón Costas era producto de un conflicto intra-oligárquico, por cuanto Robustiano Patrón Costas era sobrino carnal de Francisco J. Costas, un Rochista adversario acérrimo del clan Uriburu, y sobrino nieto político de Delfina Ovejero Zerda, mujer de su tío abuelo carnal Miguel Jerónimo Figueroa Güemes, la cual a su vez era tía carnal del Gobernador David Ovejero Zerda. A esta acusación de nepotismo que impulsaba la oposición desde la prensa y el parlamento, la replicaron el propio Dr. Linares desde su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y el senador nacional oficialista Carlos Serrey Dávila. Cuando se trata de la oligarquía, Linares aducía que

"...no se puede tener el mismo criterio cuando se habla de las grandes provincias del litoral, abiertas a todas las corrientes del elemento extranjero, y de las demás provincias que están en contacto fácil e inmediato con ellas, que reciben el aporte de sangre que remueva la propia, que modifica los apellidos y dilata los vínculos de familia".<sup>8637</sup>

Para dichas provincias el criterio podía ser severo; pero no podía serlo igualmente, aducía Linares, para la de Salta

"...provincia mediterránea y lejana, con difíciles medios de comunicación,...donde existen pocas familias pudientes, de arraigo y de tradición, cuyos hijos vienen a educarse en las aulas universitarias u ocupan allí altas posiciones en el comercio y en la industria".<sup>8638</sup>

En esa sociedad, no era extraño, argumentaba Linares, que en "...una familia grande,...vinculada a todas las demás de la provincia, de inmejorable posición pecuniaria", como la familia Ovejero, a la que se había tachado de oligárquica,

"...haya habido dos o tres gobernadores vinculados a la misma, que, sin llevar el mismo apellido, sin ser entre sí parientes íntimos, porque no lo es ninguno, se hayan sucedido en el mando".<sup>8639</sup>

Con referencia al parentesco, Linares sostenía que se exageraba mucho pues

"...se me creía por ejemplo pariente del Señor Zerda...[cuando] no soy su pariente, soy su amigo sincero; quiero y respeto a ese ciudadano venerable, que cuenta en su haber tantos servicios prestados a la provincia; pero no soy su pariente, dentro de las reglas que la ley y la sociedad reconoce, dentro del sexto grado de consanguinidad y del cuarto de afinidad".<sup>8640</sup>

En efecto, dentro de un punto de vista puramente legal no existía parentesco por cuanto la madre de Don Luis Linares Usandivaras era sólo hijastra de la hermana mayor de Don Ángel Zerda, Doña Servanda Zerda y Medina, segunda mujer de su abuelo carnal Don Manuel Usandivaras y Díaz de la Fuente.<sup>8641</sup> También argüía Linares que

"...se me cree pariente del Dr. Ovejero. No, Sr. Presidente; no soy pariente muy inmediato del Dr. Ovejero, de quien fui Ministro y a quien sucedí en el mando: soy pariente en el quinto grado de consanguinidad, y ser pariente en el quinto grado de consanguinidad, dentro de nuestras costumbres sociales, es lo mismo que no serlo: predomina la condición de amigo más que la de pariente".<sup>8642</sup>

Y para remachar la réplica, el Senador Serrey hacía constar que paradójicamente mientras al candidato Dr. Linares y al ex-Gobernador Ovejero los unía un remoto parentesco en el séptimo grado, el candidato de la oposición Dr. Ortiz Viola estaba íntimamente ligado a la familia del ex-Gobernador Ángel Zerda Medina; porque era "...doblemente tío de la esposa de éste, hermano de la madre y primo hermano del padre, e igualmente vinculado a la familia del gobernador actual [Ovejero Zerda]".<sup>8643</sup> Esta realidad Serrey la explicaba aduciendo que en tierra adentro, a diferencia de Buenos Aires,

"...todos somos parientes por las afinidades que se contraen con el matrimonio; raro es el que no tiene parentesco o vínculo de familia; y se ha visto alguna vez, a propósito de otras provincias, que se ha dicho que las autoridades, los empleados y hasta los porteros eran parientes del gobernador".<sup>8644</sup>

Por ello, Serrey argüía, no sin acierto, que para que se pudiera sostener la acusación de nepotismo, debían concurrir dos condiciones inexcusables:

"...que la mayor parte de los empleos de la administración estén a cargo de los parientes del gobernador y que hayan sido llamados, no por su competencia, sino por el hecho de ser tales parientes".<sup>8645</sup>

A propósito de este debate parlamentario el Diario La Prensa, cuyo dueño José Camilo Paz, había estado profundamente enemistado con su primo hermano el Gral. Julio A. Roca,<sup>8646</sup> editorializaba el 4 de noviembre de 1906 que

"Las viejas dinastías dueñas de hecho de los destinos de las provincias, se acercan sin duda a su fin, como consecuencia de sus abusos y del robustecimiento de la conciencia cívica del país".<sup>8647</sup>

Así como las dinastías de las provincias de San Luis primero (encarnada en el gobierno de Jerónimo Mendoza Lucero),<sup>8648</sup> y de Tucumán después (encarnada en los gobiernos de José Antonio Olmos y Próspero García), se habían derrumbado; el diario de José C. Paz vaticinaba con injustificado optimismo que "...si en la Casa Rosada hubiera hombres capaces de cumplir su deber", las dinastías de Mendoza y Salta caerían también.<sup>8649</sup> Era injustificado este optimismo del editorialista del diario *La Prensa*, por cuanto, como luego veremos, en casi todas las provincias las oligarquías lograron perpetuarse en forma casi vitalicia, aunque por razones no siempre semejantes.

### **Z-III El rol político de un censo demográfico. El caso de Tucumán.**

Por las virtudes y la popularidad del gobierno de Lucas Córdoba, (a) "Barba y Chivo",<sup>8650</sup> la oposición desapareció, pues "...apenas quedaba un pequeño grupo de Radicales Intransigentes, los rezongones de siempre para todos los gobiernos y para todas las situaciones".<sup>8651</sup> Hasta ese momento los partidos habían conservado su estructura tradicional: "...en el orden nacional, cívicos y nacionalistas, y en el local federales y liberales, especie de Montescos y Capuletos tucumanos que han luchado [entre sí] desde el primer año de la República".<sup>8652</sup> En el gobierno del Dr. Próspero Mena,<sup>8653</sup> se esbozaron las divisiones, que "...acentúan su aparición ya en la escena política y aquel gobierno comienza a surtir ya la ventolina de las aspiraciones que se encuentran y se debaten, faltas de una mano firme y segura que encauce sus corrientes y dirija sus impulsos".<sup>8654</sup>

Después de Mena vino el segundo gobierno de Lucas Córdoba, "...y aquellas divisiones se acentúan mas: aparecen los grupos sueltos perturbadores de la estructura de los viejos partidos. Toda esta lista de gobiernos se hicieron, fundidos en un propósito común, cual era el de mantener la supremacía del partido liberal que tenía bajo el común denominador a cívicos y nacionalistas".<sup>8655</sup>

Al finalizar el segundo gobierno de Córdoba, "...la campaña presidencial establece y marca disidencias fundamentales por cuestión de nombres".<sup>8656</sup> Se funda la Unión Popular, "...un compuesto de radicales incandescentes, autonomistas netos y nacionales descontentos, adversarios del Sr. Córdoba por disentimiento con el nombre del candidato presidencial".<sup>8657</sup> Esa agrupación, la Unión Popular, se formó exclusivamente con fines nacionales para apoyar la candidatura presidencial de Marco Avellaneda,<sup>8658</sup> "...que la proclamó y sostuvo en los comicios, sacando seis electores contra doce del Acuerdo sobre el total de dieciocho que daba Tucumán".<sup>8659</sup> Como la Unión Popular no había tenido fines locales, no concurrió a la inscripción provincial. Descontaron el triunfo en el orden nacional y contaron con dar vuelta totalmente y a su gusto la situación de la provincia.

Injertada a esta cuestión sucesoria presidencial estaban otras dos cuestiones: la Gobernación y la senaduría, que quedaba vacante por culminación del período que correspondía a Zenón Santillán.<sup>8660</sup> La primera cuestión, la de la gobernación, era difícil por cuanto Neptalí R. Montenegro, nuevamente candidato, "...sufría la tenaz oposición de la Unión Popular y del grupo vencido en lucha por la senaduría".<sup>8661</sup> La segunda cuestión, la senatorial, dio lugar a una lucha reñida entre Montenegro y Santillán, que buscaba su reelección, y como en la Legislatura "...no se pudiera llegar a un acuerdo definitivo, la mayoría compuesta por amigos de Córdoba evolucionó buscando un nombre que disipara oposiciones y suavizara asperezas".<sup>8662</sup> En esas condiciones fue elegido como senador el Dr. Alberto León de Soldati.

En cuanto a la gobernación, el partido nacional y la Unión Cívica convinieron buscar para ella un hombre que "...alejado de las luchas políticas no despertara oposición y que tuviera una representación neta de la Unión Cívica, al mismo tiempo que fuera una seguridad de tino y de buen gobierno".<sup>8663</sup> Fue entonces que a juzgar por la opinión de *El Diario*, "...se cometió el error de irlo a buscar en los Tribunales, entre los jueces antiguos, entre los que por su hábito de aplicar estrictamente la ley, no fueran capaces de alterarla en el gobierno".<sup>8664</sup> En esa búsqueda se dio con el Dr. José Antonio de Olmos, a quien "...no se le exigió ninguna condición; lisa y llanamente se le ofreció el cargo, bajo la tácita idea de que razones de orden moral, debían mantener al Sr. Olmos en el puesto sin romper con

la tradición de su partido".<sup>8665</sup> Olmos aceptó y realizó un viaje a esta Capital, y los que lo conocen aseguraban

"...que este viaje lo perdió. Buen hombre en el fondo, pero ingenuo y débil, sufrió la transformación del provinciano joven e inexperto al que la casualidad lo lanza en el boulevard parisien. Volvió otro, sus mismos amigos no lo conocían, había adquirido un vigor artificial, una fortaleza extraña y su acostumbrada bonhomía desapareció para dar lugar a un estado de seguridad en su poder y en su capacidad, que ya algunos sospecharon que haría el Luis XV tucumano, con las consiguientes distancias".<sup>8666</sup>

Elegido Gobernador y hecho cargo del puesto, su primer decreto fue una desilusión para la Provincia. Nombró Ministros al Dr. Ricardo Viaña y al ex-Gobernador Lídoro J. Quinteros.<sup>8667</sup> Al principio se creyó que en los actos de gobierno predominaría la influencia de Viaña, por sus vinculaciones con Olmos; pero eso no fue sino una vana esperanza, pues Quinteros, que "...era más avezado a estos tejes y madejes de entre bastidores, logró imponerse en el espíritu del Gobernador y dominó la situación en absoluto, obligando a renunciar a su colega".<sup>8668</sup>

Fue en esas circunstancias que se definieron bien las posiciones. Los que habían llevado al Dr. Olmos al gobierno, "...nada tenían de común con él, desde que se entregaba por completo a su Ministro Quinteros, vinculado estrechamente al autonomismo y adversario decidido de la política del partido Nacional y de la Unión Cívica".<sup>8669</sup> El vigor del Dr. Olmos "...no tenía la suficiente capacidad como para realizar la obra de desalojar a todos los que lo habían llevado al gobierno, de las posiciones que ocupaban".<sup>8670</sup> Como su valor personal tampoco bastó para todo eso, se encargó de la ingrata tarea al Ministro Quinteros. Para esto, el Gobierno

"...solicitó licencia de la Cámara. Por la Constitución, en ausencia del gobierno ejerce el cargo el Ministro de Gobierno, y de esta manera se daba la facilidad que se buscaba. La Legislatura negó la licencia, y el Gobierno no se atrevió a hacer lo que había encomendado a su Ministro".<sup>8671</sup>

Olmos, que en realidad no era sino un auxiliar del Sr. Quinteros, verdadero director de la política oficial, trató de deshacer la mayoría legislativa. Al no lograrse defecciones, se buscó entonces "...el apoyo de aquella Unión Popular empalmando en el Pellegrinismo que hizo punta para dar lugar a esta junción y de fácil soldadura con el Sr. Quinteros".<sup>8672</sup> Hecha esta evolución, el Gobierno "...elaboró por cuenta de la Unión Popular, por mas que los Radicales y Nacionales se separaron de esta comunidad que protestaron a su tiempo".<sup>8673</sup> Con todo, la Legislatura seguía compuesta como antes, y entonces el Ministro Quinteros hizo un rápido viaje a Buenos Aires, de donde trajo en la valija el decreto que le permitió deshacer la mayoría opositora. La Legislatura Tucumana no había dictado ley alguna que alterara la cifra de senadores y diputados representativos de la población que existía antes del Censo de 1895. Para obviar esta situación, el Gobernador Olmos, que no tenía mayoría favorable en la Legislatura, "...dictó un decreto convocando a elecciones de senadores, diputados y electores", de acuerdo con el censo de 1895, que el gobierno reconoció y aprobó sin la intervención legislativa.<sup>8674</sup>

Pero ni Quinteros ni Olmos poseían cuadros políticos para siquiera lograr una representación aproximada de la elección:

"...Entonces se selló el pacto con la Unión Popular adjudicándole un Ministerio en la persona del Dr. [Rufino] Cossio, pero no se contó con que esa agrupación en su casi totalidad protestaba el convenio, y que no tenía hecha la inscripción provincial. La elección se hizo inventando Electores, pero se hizo".<sup>8675</sup>

Finalmente, Olmos hizo la elección aumentando el número de legisladores con arreglo a la población que dio el último censo nacional.<sup>8676</sup>

Por otro lado, la oposición desconoció el decreto que aceptaba el nuevo Censo, y solo concurrió a los lugares puntuales en que según su criterio debía efectuarse la elección. Fue entonces que se hicieron comicios dobles y que se eligió doble representación legislativa.<sup>8677</sup> Ese decreto, las elecciones convocadas y la doble Legislatura resultante de las mismas fueron los motivos del conflicto que llevaron, en septiembre de 1905, a la Intervención Federal en la persona del Senador Nacional Jujeno Domingo T. Pérez.<sup>8678</sup> En otras palabras, el Congreso Nacional reconoció, con la Intervención votada, que Olmos "...no pudo alterar las cifras de la representación, puesto que esta facultad le está conferida, por la Constitución, solo a la Legislatura".<sup>8679</sup>

Pero a partir de 1906, el cargo más serio que pesaba sobre el partido oficial de Tucumán era el del nepotismo. Con el Gobernador Ing. Luis F. Nougés Terán se reinició una dinastía de gobernadores y parlamentarios emparentados entre sí e íntimamente vinculados a la industria azucarera (ver Cuadro T-IV y Apéndice T-IV), la cual se continuó con la administración de su tío segundo José Frías Silva.<sup>8680</sup> La reelección en 1909 del Senador Nacional Brígido Terán y del Diputado Nacional Miguel Padilla vino a sellar definitivamente la influencia del nepotismo.<sup>8681</sup> En un principio, Frías Silva se opuso a sus reelecciones, pero más luego cedió a la parentela.<sup>8682</sup> Más tarde, la dinastía que reiniciara Nougés Terán se continuó con la administración de su primo Ernesto Padilla Nougés, y se consolidó socialmente inaugurando en el cerro San Javier un exclusivo espacio urbano-rural denominado Villa Nougés.<sup>8683</sup>

#### **Z-IV El nepotismo desatado. El caso de Catamarca.**

Con motivo del intenso nepotismo desplegado por la familia Castellanos, se formó en Catamarca la llamada Unión Provincial y su correspondiente Junta de Guerra,<sup>8684</sup> la que propaló en 1898 un manifiesto al pueblo.<sup>8685</sup> Esto dio lugar a permanentes rumores de revolución y a un frustrado estallido el 23 de Septiembre de 1899 que terminó con la ejecución sumaria de sus protagonistas (Antonio Rivera y Ramón Barros).<sup>8686</sup> El Partido Nacional seguía subdividido en cuatro facciones: Figueroístas, Castellistas (separatistas), situacionistas (los caídos), y Herreristas,<sup>8687</sup> originando así no un dilema entre dos jugadores sino entre cuatro jugadores.<sup>8688</sup> Los Veedores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, Miguel Cané,<sup>8689</sup> y Valentín Virasoro, denunciaban en Octubre de 1899 que en la administración de Flavio Castellanos "reinaban el desorden y el nepotismo".<sup>8690</sup> Cané y Virasoro también denunciaban que la Legislatura

"...está compuesta en su casi totalidad de parientes, que al mismo tiempo se han repartido todos los empleos de la administración, empezando por los altos cargos y terminando por los puestos más humildes del servicio municipal o policial".<sup>8691</sup>

Para mayor abundamiento, el Diputado Nacional por Catamarca Delfín Gigena,<sup>8692</sup> manifestaba que en su provincia se había "...hecho un gobierno puramente de familia", y el

Diputado Nacional por Córdoba Rufino Varela Ortiz denunciaban que en Catamarca estaba entronizado "...un nepotismo odioso".<sup>8693</sup> En cuanto a la oposición, el Diputado Nacional por Catamarca Félix F. Avellaneda,<sup>8694</sup> revelaba la naturaleza intra-oligárquica de los conflictos políticos desatados en el interior del país, región donde no se había experimentado la inmigración masiva, al afirmar que "...hermanos y sobrinos de los que gobiernan, figuran en la oposición".<sup>8695</sup> Más aún, por el sólo hecho de simpatizar con la revolución contra Castellanos, sin haber tomado las armas en ella, los hombres del oficialismo, "...persiguen a sus mismos parientes".<sup>8696</sup>

## **Z-V La intervención federal. El caso de La Rioja.**

La idea de la fusión o conciliación,<sup>8697</sup> entre las dos facciones en que estaba dividido el Partido Nacional en La Rioja (el Bustismo y el Gonzalismo) hizo, a comienzos de 1897, rápido camino. Aunque no era posible una fórmula concreta, la constitución de dos Comités que obedecían a Bustos y a González consumó la fusión.<sup>8698</sup> No obstante la unión, el deterioro político había llegado a tal grado que, según Máximo de la Fuente en carta a Roca, "...hoy hemos quedado en la ciudad y campaña de un lado todo el pueblo, del otro sólo los empleados del poder oficial".<sup>8699</sup> Entre estos últimos se encontraban los miembros de la Legislatura, el Poder Ejecutivo, y los Jefes Políticos de la Campaña. La Legislatura, afirmaba De la Fuente

"...con leyes de ocasión y presedentes demasiado graves, el Poder Ejecutivo con destituciones y persecuciones, los jefes políticos de la campaña con prisiones y multas abrumadoras, son la demostración elocuente de una lucha libre, espontánea, y general contra una fracción que había perdido el buen tino de las formas siquiera, para llegar al colmo y anquilosarse en sus propios actos".<sup>8700</sup>

Al año siguiente, en 1898, con motivo del eterno continuismo del Gobernador Francisco Vicente Bustos,<sup>8701</sup> de su participación en la apropiación de tierras,<sup>8702</sup> y de su nepotismo --había designado como su sucesor a su sobrino el Senador Antonio P. García-- se produjo un estallido revolucionario que provocó la intervención federal a cargo del Dr. Benjamín Figueroa.<sup>8703</sup> Habiendo levantado el Gobernador Bustos en marzo de 1898 como candidato a Gobernador a su sobrino el Senador Antonio P. García, hizo sospechar que ella obedecía al interés de que García le reservara la banca de senador cuando él dejara el gobierno. En efecto, para lograr este despropósito a comienzos de marzo de 1898 la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado provincial no obedecía a otro fin, según Catalán, sino a perpetuarse en el poder "...a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de Bustos, renunciar este el Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino García".<sup>8704</sup>

Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar interminable",<sup>8705</sup> lo cual finalmente provocó el 23 de abril de 1898 una insurrección o levantamiento popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista.<sup>8706</sup> Bustos, quien durante el motín tuvo que refugiarse en la Oficina de Enganche, se encargó luego de disminuir la importancia del acontecimiento

manifestándole a Roca que "...lo que se dijo al principio que era una revolución, era sencillamente una asonada la cual pude al día siguiente desparramar".<sup>8707</sup> No obstante la opinión de Bustos, éste y García presentaron sus renunciaciones y Carreño fue electo Gobernador. A esa política de círculo familiar, no escaparon según refiere Bazán (1979), ni siquiera los enemigos del Bustismo, como era el caso de Joaquín V. González, miembro del partido Carreñista, quién predicaba la necesidad de una efectiva democracia.<sup>8708</sup>

## **Z-VI Arbitraje de terceros. El caso de Cuyo.**

En cuanto a San Luis, tan dividida se encontraba la elite dirigente Puntana, acerca de la persona que debía elegirse para Gobernador, que en diciembre de 1896, la Junta Electoral del Partido Nacional, aceptó someter dicha elección al arbitraje de un tercero. Este estuvo compuesto por el dúo formado por el Gral. Roca y Carlos Pellegrini,<sup>8709</sup> quienes finalmente eligieron a Adeodato Berrondo.<sup>8710</sup> Este último se propuso mantener el equilibrio entre las dos ramas en que se hallaba dividido el P.A.N., llevando de Ministros al Roquista Jacinto Videla,<sup>8711</sup> y al Pellegrinista Víctor S. Guinazú.<sup>8712</sup> Desde el primer día de designados los Ministros, se libró entre ellos una lucha tenaz "...hecha de preponderancia nada más".<sup>8713</sup> Pero parece que Berrondo o el Senador Eriberto Mendoza o los dos a la vez,

"...no han querido borrar aquella línea divisoria entre estas agrupaciones por más pruebas de lealtad y desprendimiento que les hemos dado; pues en todos los momentos nos hemos presentado y unidos y decididos a sostener esta situación, pero persiguiendo aquel propósito por desconfianzas injustificadas: nuestros amigos o sea a la fracción llamada Arditista o Videlista, nos vemos escludidos en todo y separándonos paulatinamente de toda participación o representación en el Gobierno como partido, haciendo exclusiones muy marcadas, no obstante de participar en este carácter de todas las responsabilidades en los actos del Gobierno, lo que no creo correcto ni lógico".<sup>8714</sup>

Y en oportunidad de la elección de diputados de 1896, el Gobernador Lindor L. Quiroga, emulando la antigua conducta de los Mendoza Lucero, convocó a los Dres. Juan A. Barbeito,<sup>8715</sup> y Jacinto Videla, y después de hablar con ellos algunas generalidades, "...sacó del bolsillo un papel en que estaban escritos tres nombres y se los presentó diciéndoles, he aquí la lista de diputados y los he llamado para hacérselas conocer".<sup>8716</sup> Al replicar dichos doctores que consideraban inusitado el procedimiento, alegaron "...que lo correcto era que el asunto se librase a los círculos políticos que a ellos debía dirigirse la consulta".<sup>8717</sup> Quiroga les contestó "...que a ellos los consultaba por deferencia, que nada tenían que hacer los círculos políticos, que dijese si aceptaban o no la lista que él les sometía".<sup>8718</sup> Barbeito colaboró con Quiroga aceptando la lista, porque en su condición de Pellegrinista le convenía, y Videla "...que se veía aplastado por ella, la rechazó terminantemente diciendo que el Gral. Roca no le había pedido ese sacrificio y que no tenía porqué imponérselo".<sup>8719</sup> Pero a juzgar por Eriberto Mendoza, tal era la violencia existente en San Luis que ni confeccionando el propio Gobernador Quiroga la lista pueden hacerse de elementos, pues

"...las elecciones las ganan a balazos y asimismo quien sabe, pues si vamos a la lucha, como casi es seguro que suceda aceptaremos la contienda en el terreno que la coloquen".<sup>8720</sup>

Y ya entrado el siglo, en 1904, en virtud de un movimiento popular que había derrocado al Gobernador Jerónimo Mendoza Lucero,<sup>8721</sup> y aprisionado al Senador Eriberto Mendoza, y al Diputado Narciso G. Gutiérrez,<sup>8722</sup> el gobierno federal se vio obligado, a intervenir San Luis nuevamente, apoyado desde el Senado por Don Bernardo de Irigoyen.<sup>8723</sup> La nueva intervención argüía para justificar su rol en que el entonces Gobernador Jerónimo Mendoza y su hermano el tres veces Senador Nacional Eriberto Mendoza (1892-1919) habían establecido una suerte de régimen aristocrático o dinástico, reñido con el orden republicano.<sup>8724</sup> Un amigo de Roca, el Interventor Francisco Beazley, constataba que

"...la inmensa mayoría de esta ciudad es decididamente hostil a los Mendoza, con una hostilidad violenta, casi rabiosa, que muy bien podría llegar hasta el crimen, en caso de reposición".<sup>8725</sup>

En 1904, la oposición Puntana le pidió al Interventor Francisco Beazley que solicitara al Ministro del Interior una resolución "...ajustando la representación legislativa al Censo Nacional del 95".<sup>8726</sup> En las provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 3289/95) la oposición fué reclamando perentoriamente su actualización. Para el Senador Eriberto Mendoza era "...una verdadera reforma de ocasión y tendiente a favorecer a un partido".<sup>8727</sup> El adoptar el Censo de 1895 era para el Senador Mendoza "...del exclusivo resorte de las autoridades locales, [pues] el Censo es una ley nacional y para efectos nacionales las provincias están en su derecho de adoptarlo o no".<sup>8728</sup> Si en San Luis dicha Reforma no estaba en vigencia, era a juicio de Mendoza porque

"...no se ha podido reformar la Constitución para variar la proporción de tres mil habitantes porque se elige cada Diputado y también porque la adopción del Censo del 69 es prescripción Constitucional y no legal".<sup>8729</sup>

Luego de la revolución que derrocara a los Mendoza, un grupo numeroso perteneciente a diversos credos políticos,<sup>8730</sup> formó lo que se llamó entonces Unión Provincial, y llevó al gobierno al Dr. Benigno Rodríguez Jurado, (a) "El Rengo".<sup>8731</sup> De inclinaciones Modernistas, pertenecía a su vez a otra dinastía política (ver Cuadro SL-I).<sup>8732</sup> Pero este grupo se desilusionó muy pronto y le restó su apoyo.<sup>8733</sup> Lo que antes era la Unión Provincial, se volvió a juicio de El Diario, "...lo que hoy puede llamarse partido Rodríguez-Zavala", por el cuñado Jorge A. Zavala.<sup>8734</sup> Rodríguez Jurado sufrió luego la traición a manos de sus propios sobrinos, Adolfo y Ricardo Rodríguez Sáa, pues estos se le alzaron en 1906.<sup>8735</sup> Dicho alzamiento o motín policial persiguió inútilmente impedir que se hiciera cargo de la administración el segundo gobernador revolucionario Dr. Estéban P. Adaro, quien aunque Autonomista fue electo por las mismas fuerzas populares que habían derrocado la dinastía de los Mendoza.<sup>8736</sup> En realidad, según Melo (1964), al decidir Adaro hacer gobierno prescindiendo de sus coaligados de la víspera (Republicanos y Nacionalistas), estos últimos alzaron a las fuerzas policiales, impidieron su asunción del mando y constituyeron una Junta Revolucionaria (1907).<sup>8737</sup> Enviada la Intervención Federal del Santafesino Manuel M. de Iriondo, éste último finalmente entregó el gobierno a Adaro.

## **Z-VII La persistencia de la fractura geográfica. El caso de Santa Fé.**

Reemplazado el Gobernador Juan M. Cafferata y desafiado el círculo político encabezado por José Gálvez por el que dirigía Luciano Leiva,<sup>8738</sup> la crisis de sucesión que se abrió a fines de siglo, fue resuelta por Roca, tras arduas negociaciones, a favor de Juan Bernardo Iturraspe.<sup>8739</sup> Como la candidatura de Iturraspe,<sup>8740</sup> estaba puesta en tela de juicio por Galvistas y Leivistas, surgieron como alternativas la del Dr. Luis A. Vila, prohijado por su primo Juan Terrosa, y ayudado por el Gobernador de Entre Ríos Sabá Z. Hernández; la de Juan Terrosa acompañado por "...los mismos elementos de familia que a Vila,...[ambos con] anteriores afinidades con Marcos Juárez y más tarde con el modernismo";<sup>8741</sup> y la del Dr. José García Gonsález, prohijado por el ex-Gobernador Juan Manuel Cafferata.<sup>8742</sup> No obstante todas ellas, prevaleció finalmente la voluntad del Presidente por la candidatura de Iturraspe.

Pero la incidencia de la fractura geográfica entre las ciudades de Santa Fé y Rosario persistía aún a fin de siglo, en desmedro de otro tipo de fracturas. Al referirse a los candidatos a Gobernador, el rosarino Desiderio Rosas,<sup>8743</sup> le manifestaba a Roca, "...que todos aquellos individuos son hombres del Rosario y tu sabes toda la repulsión y los temores que les suspiramos a los hombres de Santa Fé, ante el peligro para estos, de perder la Capital de la Provincia".<sup>8744</sup> Finalmente, con motivo del asesinato del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli,<sup>8745</sup> la candidatura de Iturraspe fué confirmada, nombrándose en lugar de Grandoli a su hermano Octavio "...hermano del finado y pariente mío por ser casado con una hija del Dr. Freyre".<sup>8746</sup> A último momento, el Diputado Lorenzo Anadón intentó persuadir al Gobernador Luciano Leiva que eliminara la candidatura Iturraspe proponiendo la del ex-Gobernador de Mendoza Tiburcio Benegas, pero fracasó en el intento.<sup>8747</sup> Pero en su afán de diferenciarse de los Leivistas que le habían dado su apoyo y de los Galvistas o Pellegrinistas que se lo habían retaceado, Iturraspe entró a hacer un gobierno personal y de familia, que se enajenó la animadversión de todo el pueblo santafesino.<sup>8748</sup> El conflicto político se acentuó en la campaña electoral de Noviembre de 1901, y alcanzó su paroxismo en Villa Casilda, provincia de Santa Fé, con el crimen del Jefe Político del Departamento de Caseros, José R. Saurit.<sup>8749</sup>

## **Z-VIII Otra intervención federal. El caso de Corrientes.**

En Octubre de 1907, durante el segundo gobierno de Juan Estéban Martínez,<sup>8750</sup> se desató una crisis política que culminó en violentas acciones armadas y en la inefable intervención federal, esta vez encabezada por el Dr. Eugenio Puccio.<sup>8751</sup> A posteriori, el gobierno nacional apuntaló una nueva coalición política de la que resultó gobernador en 1908 el Dr. Martín Goitía. Pero esta coalición alcanzó a durar sólo poco más de un año, pues los sangrientos sucesos desencadenados en la localidad de La Cruz, donde representantes del gobierno asesinaron fríamente al Comisario Comandante Taborda y al Sargento Camacho, y se mutilaron sus cadáveres.<sup>8752</sup> De esta forma, a juicio de El Diario, el Presidente Figueroa Alcorta "...consigue tener otro gobierno débil, que es decir entregado a discreción bajo la exclusiva tutela de las fuerzas de línea".<sup>8753</sup> Con ello le quita al Gobernador de Corrientes "...toda veleidad de independencia, pero en cambio lo tiene como agente eficaz de la campaña presidencial que se propone emprender solo".<sup>8754</sup>

## **Z-IX.- Dilemas de las opciones estratégicas.**

En cuanto a la Gobernación de Los Andes --territorio correspondiente al subconjunto político del Norte, y cuya supremacía la disputaban también el Autonomismo y los Cívicos-- el político Autonomista de Salta David Ovejero Zerda, venía patrocinando a su concuñado el terrateniente Don Ricardo Isasmendi,<sup>8755</sup> no sin las necesarias explicaciones "...para que no pueda creerse que me anima en esto un espíritu de favoritismo personal, o miras interesadas de orden puramente privado".<sup>8756</sup> Entre las explicaciones más fundadas de su actitud, Ovejero se refirió a que cuando en Salta a comienzos de la década del 80, hizo su aparición el Rochismo

"...era necesario estrechar filas y presentarse unidos a costa de cualquier sacrificio, y entonces yo, invocando precisamente los vínculos de parentesco y de la amistad con Isasmendi, logré que este abdicase toda aspiración propia y coadyubase con sus amigos a los propósitos del interés común del partido".<sup>8757</sup>

A esto, Ovejero agregaba que si bien él no tenía derecho "...de hacer política para mis parientes", tampoco lo tenía yo "...para cruzármeles en su camino y quitarles lo que no les he dado y era su derecho propio, como en ese caso de Isasmendi".<sup>8758</sup> Ovejero le planteaba a Roca su situación para el caso de llegar al Gobierno, en que podrían repetirse las mismas circunstancias,

"...o tendré que ponerme otra vez de estorbo para su carrera política, o habré de dejarle abierto el camino. Para lo primero, no me considero con derecho, y para lo segundo ya veo el cargo de que quiero hacer gobierno de familia, cuando mi propósito precisamente, como se lo dije allí, es dar participación, en la medida de lo posible, al elenco formidable de todos los grupos que han levantado mi candidatura".<sup>8759</sup>

En los dilemas de las opciones estratégicas contaban como jugadores no solo los partidos o facciones sino también los clanes familiares. En el clan de los Figueroa y los Cornejo, sus jefes actuales eran a juicio de Antonino Díaz,<sup>8760</sup> el Diputado Nacional Dr. Pedro J. López Cornejo,<sup>8761</sup> el Sr. Juan Cornejo,<sup>8762</sup> el Dr. Fernando López,<sup>8763</sup> y el Dr. Rafael Usandivaras Aráoz.<sup>8764</sup> Sin embargo, el clan de los Figueroa, que aún persistía políticamente en la persona del Dr. Ricardo Pío Figueroa,<sup>8765</sup> estaba

"...encastillado en ilusiones sin fundamento político real, [y] es un obstáculo serio para que el Dr. [Ángel M.] Ovejero pueda concentrar a su alrededor toda la masa del partido nacional".<sup>8766</sup>

En ningún caso podía Ricardo Figueroa obtener el triunfo,

"...y sin embargo su actitud fomenta a nuestros enemigos [Martín Gabriel Güemes y Delfín Leguizamón] que hay que vencer a toda costa sopena de peligrar nuestro dominio en esta provincia".<sup>8767</sup>

En el clan de los Uriburu, de honda raigambre Mitrista, y enemigo del clan de los Ortices,<sup>8768</sup> retomó la hegemonía la persona de Don Pío Uriburu. Este último, un ex-Rochista, le manifestaba en 1896 a Roca, un Presidente de prosapia Tucumana, que

"...los Ovejero con D.Sisto a la cabeza, Ángel Zerda, los Michel Benítez, Félix Saravia, que formaban entre los radicales o disidentes están ahora en nuestras filas y ni aún su amigo D. Francisco J. Ortiz ha escapado al impulso inicial, de manera

que sin exageración, podemos afirmar que somos la gran mayoría no sólo como elemento de lucha sino como ilustración, fortuna y concepto".<sup>8769</sup>

El mismo Pío Urriburu fue el que consagró en 1901 como gobernador a Don Ángel Zerda Medina,<sup>8770</sup> propietario conjuntamente con Félix Usandivaras Zerda,<sup>8771</sup> y su sobrino segundo David Ovejero Zerda, del Ingenio Ledesma. No obstante su rol en la designación de Zerda como Gobernador, Pío Urriburu debió disputarle a otro ex-Rochista Don Ángel M. Ovejero,<sup>8772</sup> la preeminencia sobre el ánimo de Zerda. Finalmente, el clan de los Arias,<sup>8773</sup> quería acaudillar a Ovejero y destruir la influencia de Urriburu y de sus amigos, pero la perspicacia de Pío Urriburu pudo sobreponerse en el espíritu de Zerda.<sup>8774</sup>

### Capítulo III-F-27.-

#### **Excepcionalidad ficticia del caso argentino en el cono sur. Golpes de estado en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile**

En las postrimerías del gobierno del presidente Luis Sáenz Peña (1896-97), para el secretario de redacción de ***El Municipio*** (Rosario) Cipriano Benítez y su editor-propietario Deolindo Muñoz, en el afán del poder político nacional de imponerse al pueblo, "...envió tropas a todas las provincias para que a culatazos arrojaran del comicio a los ciudadanos que en uso de derechos sagrados e imprescriptibles iban a depositar su boleta en las urnas receptoras; si, para que a culatazos les arrojaran si los recursos ignominiosos de la matufia electoral no daban resultados".<sup>8775</sup>

En toda la República las tropas del ejército de línea fueron distribuidas estratégicamente, "...y son los jefes militares los que realmente mandan, obedeciendo las instrucciones que les transmite la superioridad, pues los gobernadores no representan otra cosa que elementos decorativos de que se sirve el Sr. Presidente para disfrazar su política liberticida".<sup>8776</sup> No eran los gobernadores Leiva, Hernández, Lagar, Aráoz, Morón y Anzorena los que mandaban en Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, y Mendoza, respectivamente, "...sino los jefes de las fuerzas que guarnecen esas provincias, aquellos no son ni significan otra cosa que instrumentos decorativos o de figuración para disfrazar con el manto augusto de la constitucionalidad a la tiranía odiosa que nos rige".<sup>8777</sup> Por eso era que ***El Municipio*** muchas veces había llamado "...autocracia anónima al régimen implantado en el país".<sup>8778</sup>

Este sistema liberticida le había servido al Dr. Sáenz Peña para imponer su política, "...ejercer coacción sobre el pueblo y afianzar su estabilidad pero, al estado a que han llegado las cosas, será elemento de su propia ruina y de la ruina de nuestras instituciones liberales".<sup>8779</sup> Pero el Dr. Sáenz Peña, con el régimen de fuerza impuesto al país "...ha labrado su propia fosa, como lo hemos dicho al empezar estas líneas pues ha preparado la dictadura militar".<sup>8780</sup> En efecto, Sáenz Peña gobernaba, pero Deolindo Muñoz, director-propietario de ***El Municipio*** auguraba que el elemento que lo sostenía en el ejército, "...cualquier día se cansará de ser instrumento y se impondrá al pueblo y gobierno, proclamando un dictador".<sup>8781</sup> Según el pesimista criterio de ***El Municipio***, debía ocurrir lo mismo "...que ha ocurrido en otras épocas en la República Oriental, donde Latorre y Santos se entronizaron en el poder por medio de la tropa de línea: en el Brasil, donde da Fonseca y Peixoto hicieron otro tanto; y en el Paraguay, recientemente,

donde Egusquiza asociado a otros generales de prestigio, se sirvió del ejército para deponer al presidente González y hacerse proclamar él para reemplazarlo”.<sup>8782</sup>

Si aún no habían sucedido en Argentina estos fatídicos pronósticos era porque este país contaba con la excepcionalidad de “...jefes y oficiales ilustrados que no se prestarán para un golpe de estado que suprima el imperio de la Constitución y que implante un régimen tan funesto”.<sup>8783</sup> Pero más tarde o más temprano Muñoz vaticinaba que habría de suceder, “...porque esos [pundonorosos] jefes y oficiales están siendo pasados a la plana mayor, mientras que se da de alta [se asciende] en los cuerpos a los que obedecen ciegamente la consigna de los que mandan, ya sea porque tienen simpatía por ellos y su política, porque los ciega la ambición o porque no tienen ideales ni sentimientos cívicos”.<sup>8784</sup>

## **Sección III-G**

### **Capítulo- III-G-28--Conclusión del Tomo-III**

Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por los autores citados en los diversos capítulos del tomo es que reducen la exclusión y la neutralización social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo a otras fracciones de la elite y hasta de la propia oligarquía, en especial a aquellas fracciones constituidas por los disidentes políticos (exilados, expatriados, desterrados, deportados), los llamados "parientes pobres" o "venidos a menos", la burocracia de toga, y las oligarquías de las provincias periféricas pertenecientes a los cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata (en Argentina las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis).

En la Introducción del tomo tercero habíamos señalado que las secuelas de una crisis revolucionaria (11 de septiembre de 1852) se extendieron al resto del espacio de influencia del foco secesionista porteño, adaptando para su reconocimiento las tesis del shock político de Goertz y Diehl (1995) y la forma o modo de transición política inaugurado por las coaliciones autoritarias mismas, de Stepan (1986, 1994).

En principio, en este tomo, estudiamos las legitimaciones y el atraso cultural a partir del colapso imperial, donde encontramos que al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas regresivas (la violencia y la guerra) tuvieron un circuito bien marcado pues han viajado de una provincia a otra sin repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las transiciones u olas regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de contagio o dominó dentro de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que la violencia iniciada en la Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,<sup>8785</sup> y continuada en Buenos Aires con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero prolongado a escala nacional y continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda occidental del Río de la Plata, luego a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos Aires con Cepeda y Pavón, para rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza (1862-63); luego en todo el noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos con Aparicio y López Jordán (1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo con

Santa Rosa (1874), para desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en Corrientes con la guerra civil (1878). Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y Los Corrales (1880), para desplazarse a Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) y Uruguay (Revolución del Quebracho, 1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar finalmente en la Revolución del Parque (1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.

También al estudiar las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, encontramos que el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas.

Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto.

Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella.

Por otro lado, cuando analizamos las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico, encontramos que en la etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrismo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es

sabido, la corriente popular del Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891.

Debemos concluir entonces, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las gobernaciones de provincia, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de veto presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la propia Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fe, nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación casi total de los conflictos inter e intra-regionales",<sup>8786</sup> no puede ser sustentada.

Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;<sup>8787</sup> que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;<sup>8788</sup> y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales.

Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones constituyentes),<sup>8789</sup> el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),<sup>8790</sup> la justicia (jueces federales),<sup>8791</sup> la información periodística (corresponsales de la prensa porteña),<sup>8792</sup> las comunicaciones postales y telegráficas;<sup>8793</sup> los clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).<sup>8794</sup>

Y cuando analizamos las disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación de un orden notabiliar o elitista, encontramos que la crisis política de Santiago del Estero, a semejanza de lo ocurrido en Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador Iriondo, y en Entre Ríos con el Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder discrecional y arbitrador del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. El Presidente proponía candidatos a Gobernador y también incidía en la composición de las listas de Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era interpelado por las

distintas facciones políticas, intereses económicos, colectividades extranjeras y factores de poder. La breve historia de Santiago del Estero aquí relatada también indica como un Presidente de la República ve mermado su poder arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento de su mandato, al extremo de tener que negociar con su eventual sucesor las candidaturas de los gobernadores en juego.

Debemos también concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato Juarista (Juárez Celman) fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía especializada, pero no fue lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que impidieran la continuidad del régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.

Más aún, cuando estudiamos los crímenes políticos, encontramos que el magnicidio acontecido en San Juan en 1884, que aquí hemos tomado como paradigmático, se inscribe en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba, 1810) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción moderada.

La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad.

Y en cuanto al ajusticiamiento del soldado de filiación Radical ocurrido en Formosa en 1891, lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producían fusilamientos perpetrados por el ejército de línea. Dos años más tarde, los fusilamientos se convirtieron en el agravio más doloroso que disparó la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).

Finalmente, cuando analizamos los putschs, las secesiones y las revoluciones, encontramos que en la etapa que se inició en Mayo (1810) y concluyó en Pavón (1862), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente entre secciones geográficas, y al generalizarse los conflictos necesariamente derivaron en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a favor del partido Liberal logró finalmente la Unidad Nacional bajo la hegemonía liberal porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales

que le habían sido ajenas. Las sucesivas fracturas políticas ocurridas en la transición desde la tercer contraola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola progresiva (1852-1880), que transcurrieron entre 1852 y 1862, se correlacionaron positivamente con la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta transición la amenaza social que significó la presencia de las élites y las masas rurales de las provincias interiores, incluida la República Oriental del Uruguay, fue equilibrada o neutralizada mediante compromisos o acuerdos (Paz de Octubre de 1851, Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y Constituciones Nacional y Provinciales).

## **Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un orden absolutista (Argentina, 1880-1912).**

### **Indice**

#### **0- Introducción del Tomo-IV**

#### **Sección IV-A.- Persistencias de un orden patrimonialista y nepótico (1862-1890).**

#### **Sección IV-B.- Reacción cívica revolucionaria y dictadura tácita (1890-1905).**

#### **Sección IV-C.- Construcción de un orden oligárquico-militarista.**

#### **Sección IV-D.- Condicionantes globales y locales de una burocracia militar pretoriana.**

#### **Sección IV-A.- Persistencias de un orden patrimonialista y nepótico (1862-1890).**

Capítulo IV-A-1	Mecanismos oligárquicos en el seno de un orden prebendario	25
Capítulo IV-A-2	Organización meritocrática en el seno de un orden patrimonial	18
Capítulo IV-A-3	Orden predatorio territorial como dominación pretoriana.	20
Capítulo IV-A-4	Vestigios estamentales y represivos en el seno de una modernidad republicana traicionada	19

## **Sección IV-B.- Reacción cívica revolucionaria y dictadura tácita (1890-1905).**

Capítulo IV-B-5	Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario	19
Capítulo IV-B-6	Anti-acuerdismo, fractura militar y “Dictadura anónima”	31
Capítulo IV-B-7	Abstencionismo armado y estrategias insurreccionales.	29

## **Sección IV-C.- Construcción de un orden oligárquico-militarista.**

Capítulo IV-C- 8	Orden burocrático-pretoriano y manipulación tecnológica.	18
Capitulo- IV-C-9	Corporatismo militar en la transición a un orden burocrático-pretoriano.	22
Capítulo IV-C-10	Orden pretoriano y escarmiento anti-sedicioso	25
Capítulo- IV-C-11	Orden consensual de frontera o “Misión Civilizatoria”	14

## **Sección IV-D.- Condicionantes globales y locales de una burocracia militar pretoriana.**

Capítulo IV-D-12	Estrategia, operaciones y logística en la política pretoriana	31
Capítulo IV-D-13	Desviaciones militaristas como condicional del pretorianismo	14
Capítulo IV-D-14	Etiquetismos descalificadores en la burocracia militar.	22
Capítulo IV-D-15	Construcción del enemigo interno durante la Paz Armada	21

## **Sección IV-E.-**

Capítulo IV-E-16	Epílogo	2
Total de páginas		339

## Repertorio de Palabras Claves del Tomo IV

Acción pretoriana o contra-revolucionaria, acumulación originaria, alarmas infladas o infundadas, aluvión de colonos étnicamente discriminados, autocensura, autoritarismo, autocracia, autoritarismo policial, autoritarismo pretoriano, autoritarismo corporativo, autoritarismo de partido único, bandoleros, bonapartismo, castro-gomecismo, cesarismo, coartadas o artimañas burocráticas, colaboracionismo anti-militar con el indio, colonias indígenas militares, comercio ilegal de armamento, comité revolucionario de soldados, complicidad de colonos, compromiso revolucionario, conato sedicioso, conducción autoritaria o democrática, confesión in *Artículo Mortis*, confinamiento des-etnizador, conflicto de clase, conflicto de clase, confusión identitaria, conflictos intra-tribales, confusión de fuego amigo, conquista territorial, Consejo Verbal de Guerra, conspiracionismo cívico-militar revolucionario, corporalismo, corrupción militar, cortesanía militar, credo Prusiano, debido proceso, dependencia tecnológica, Depósito Correccional de Menores, Desburocratización, Desestamentalización, Despatrimonialización, despotismo ilustrado, disciplina militar, discriminación política en las promociones y ascensos, disolución y refundición de batallones revolucionarios, disputas de estrategia militar, docencia militar-corporativa, dueños de obrajes, ejecución sumaria, encubrimiento militar, endogamia de la oficialidad, enemigo interno, enganche, empleomanía galoneada, Escalonamiento del poder militar, Escamoteo de la opinión pública, Escarmiento anti-sedicioso, Esclavitud infantil, Espionaje contra-revolucionario, Estrategia de autodefensa o chantaje, Estrategias y tácticas insurreccionales, Ética corporativa, Excepciones al servicio militar, Fabricación de sumarios fraguados, Favoritismo militar, Filantropía evangelizadora extorsiva, Fracaso conspirativo, Fractura militar, Fuero Militar, Fuerzas morales, Gauchos matreros, Genealogía de la tragedia, Genocidio de “*pueblos sin historia*”, Guerra de escaramuzas, Honor civil, Honor militar, Honor familiar, Honor tribal, Honor dinástico, Impunidad facciosa, Indisciplina castrense, industria militar, inflación de planta o nómina, Inteligencia militar interior, Interrogatorios policiales, intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios, juntas revolucionarias, justicia penal militar, legado napoleónico, liderazgo militar, liderazgo sedicioso, manipulación de militares como fuerza coactiva, manipulación política de pases, destinos y cambios de arma, masacres indígenas, masculinización militar, mecanismo corruptor y represivo, mercadeo de grados y honores, mercenarismo, militarismo, militarización, militarización prusiana, misión civilizatoria, mitos fundacionales, motín militar, obediencia pasiva o reflexiva, omisión del derecho de defensa, operaciones de inteligencia militar, orden predatorio, orden consensual de frontera, orden institucional, orden interno contra-insurgente, orden oligárquico, orden democrático condicionado, patrones militaristas, orden patrimonial, orden burocrático, orden cesarista, orden populista, paz armada, pedagogía claustral, pena de muerte, periodismo revolucionario, pesquisa policial, poblaciones originarias, poder condicionado, porfirismo, potenciación de la represión, pretorianismo, pretorianismo absolutista, pretorianismo antiguo, pretorianismo árbitro, pretorianismo colonial, pretorianismo colonizador Habsburgo, pretorianismo recolonizador Borbónico, pretorianismo moderno, pretorianismo neo-colonial, pretorianismo directo, pretorianismo tácito o indirecto, pretorianismo explícito, pretorianismo parlamentario, pretorianismo potencial o latente, pretorianismo plebeyo o de masas, pretorianismo aristocrático u oligárquico, pretorianismo radical, prevaricación o simonía militar, progreso tecnológico, reacción cívica, reaccionario, reclutamiento militar, régimen de internado, remezones conspirativos, represalia pretoriana o contra-revolucionaria, reserva de violencia disuasoria, resistencia de sublevados, revolución, secuelas del

Consejo de Guerra, sediciones, señores de la guerra, sexualidad militar, sodomización compulsiva, suicidios inducidos, suicidios románticos, respetuoso trato de prisioneros, taxonomías, taxonomías socio-históricas, taxonomías socio-políticas, tenentismo--tribus indígenas, violencia contra-insurgente, vulnerabilidad militar,

## 0- Introducción del Tomo IV

### Índice

- 0-I.- Tradición historiográfica en materia militar republicana.
- 0-II.- Batería de hipótesis
- 0-III.- Metodología.
- 0-IV.- Diseño del Tomo.

### 0-I.- Tradición historiográfica en materia militar republicana.

La noción de pretorianismo se aplicó en los siglos XVIII y XIX esencialmente al mundo antiguo, tal como la había ensayado Montesquieu, para quien dicho régimen de poder estaba íntimamente ligado al despotismo.<sup>8795</sup> Como un intento de perfeccionar la obra de Montesquieu (*Consideraciones sobre las Causas de la Grandeza de Roma y su Declinación*), Edward Gibbon abundó también sobre el pretorianismo inherente a la debacle de Roma --dejándose influir por la teoría joaquinista de los cuatro estadios-- que fue a su vez la fuente en la que se inspiraron para sus tesis evolucionistas, entre muchos otros, Hegel, Constant, y Guizot; y más luego el propio Auguste Comte con su ley de los tres estados: teológico, metafísico y positivo; y Lewis Morgan, con su teoría de las tres fases: salvajismo, barbarie y civilización.<sup>8796</sup>

Pero diferenciándose del evolucionismo lineal de Comte y de Morgan, y como fruto de una suerte de crisis conceptual, diversos autores posteriores ensayaron exhaustivas taxonomías compuestas de diversas categorías históricas: entre ellas las categorías políticas (cesarismo, despotismo, absolutismo, totalitarismo, regalismo, putschismo), las religiosas (mesianismo, milenarismo, secularismo, fundamentalismo), las étnicas (racismo, chauvinismo), las militares (burocratismo, pretorianismo), las sociales (nomadismo, urbanismo, gremialismo, colectivismo), las económicas (mercantilismo, proteccionismo, industrialismo, imperialismo) y las culturales (laicismo, fetichismo, catastrofismo).

Entre las categorías políticas, varios autores, entre ellos Lasswell (1941), Finer (1962), Gilmore (1964), Huntington (1962, 1968), Perlmutter (1977), Irwin (2000, 2001) y Bowman (2002), diferenciaron el caudillismo del pretorianismo, este último del cesarismo o bonapartismo (por Luis Napoleón), y todos ellos del militarismo, del profesionalismo militar, del burocratismo autoritario y del terrorismo de estado. Para analizar la crisis del moderno estado-nación, Finer (1962) comenzó diferenciando cuatro tipos distintos de pretorianismo o intervencionismo militar; y simultáneamente Huntington (1962) destacó tres especies distintas de putschismo o golpe de estado. En

los distintos niveles del intervencionismo militar en la política estatal, Finer (1962) distinguió la mera presión, de la extorsión o chantaje; del desplazamiento disfrazado de accionar civil; y de la intervención desembozada. De todos ellos, en una democracia constitucional solo el primero puede considerarse como legal y legítimo, mientras que los otros niveles van creciendo en intensidad hasta culminar en el golpe de estado desembozado.<sup>8797</sup> Por el contrario, para Huntington (1962), la distinción no debe ser de grado sino de naturaleza, pues sus tres tipos de putschs o golpes son: el golpe gubernamental o de palacio, el revolucionario, y el reformista. Con referencia al pretorianismo propiamente dicho, Huntington lo definió como aquella situación política en donde se ha producido un hiato o desajuste o retraso, entre un nivel muy alto de participación política y un nivel muy bajo de institucionalización, lo que determinaba una inestabilidad y/o violencia crónica. De este retraso, Huntington derivaba, a juicio de la interpretación hecha por Alberti (2003), que para poner en “sincronía” las dos variables, en lugar de elevar la tasa de institucionalización había que bajar la participación política. Para ello, Huntington llegó hasta postular al intervencionismo militar como una fuerza modernizadora de la sociedad y del estado.

En cuanto a los géneros de autoritarismo, Perlmutter (1982) distinguió cuatro géneros diferentes: el policial o gendarme, el pretoriano, el corporativo y el de partido único; y en la formación del ejército moderno halló tres modelos de oficiales: el profesional, el pretoriano y el revolucionario. Con referencia al pretorianismo, Perlmutter discriminó – fundado en Weber-- el pretorianismo dirigente del meramente árbitro, y el explícito o manifiesto del meramente latente o potencial.<sup>8798</sup> A propósito del pretorianismo, según Rapoport, estos regímenes alternaban y alternan mucho más asiduamente con aquellos estados que sólo son cuasi-democráticos o cuasi-despóticos, que con aquellos otros que son plenamente democráticos o despóticos (totalitarios).<sup>8799</sup> Cohen (1971), Bertocci (1982), Alagappa (1995) y Khakwani (2003), analizando el sud y el sudoeste asiáticos, diferenciaron también el pretorianismo directo del indirecto, según cual fuera el tipo de alianzas y separaciones que el aparato burocrático militar hubiera celebrado y/o mantenido con los sectores civiles. Por último, para Welty (1998), la tipología Perlmutteriana del oficial o del soldado, al depender acríticamente de las doctrinas Weber-Parsonianas de las profesiones, y de su distinción entre el autoritarismo histórico o tradicional y el moderno (a partir de la cual habría nacido su noción teórica de pretorianismo), no hace otra cosa que disimular el hecho de que dicho pretorianismo y sus sufragantes vinieron a promover el poder del neocolonialismo y del imperialismo.<sup>8800</sup>

A diferencia del imperialismo y del neocolonialismo, señalados por Welty como ausentes de estos análisis; y a riesgo de incurrir en redundancias, el pretorianismo castrense, que presupone un predominio militar sin límites, sería para Irwin (2001), "...una abusiva conducta militar para con la sociedad en general y particularmente la gerencia política de una sociedad dada".<sup>8801</sup> Y dentro de este autoritarismo pretoriano, Huntington identificó tres tipos de pretorianismo que comparten en general las mismas características: el oligárquico o aristocrático, el radical (o de izquierda) y el plebeyo o de masas. El caso más conocido de pretorianismo radical en América Latina habría sido el Tenentismo en Brasil.<sup>8802</sup> Mientras que el pretorianismo dirigente vendría a ser el que conocemos como cesarismo o bonapartismo, el pretorianismo de masas es aquel que se debate en una etapa pos-cesarista. Las tres variantes son tipos ideales cuyos elementos pueden ocurrir simultáneamente en cada realidad concreta, pero que se distinguen entre sí por el grupo de poder que es dominante en cada uno de ellos, ya se trate de la

oligarquía, de grupos radicales (izquierda) o de movimientos de masas. En cada una de dichas realidades, los militares han tenido la mayoría de las veces un papel protagónico.<sup>8803</sup>

Para el caso de la Europa periférica, en particular el caso de España, Boyd (1979), Payne (1996) y Balfour (2002) descubrieron cómo la guerra colonial en Marruecos (1909) condicionó la emergencia de una política pretoriana que derivó treinta años después en la sangrienta guerra civil (1936-39). Para el caso africano, y en especial el de Nigeria, Nuscheler (1979) y Diamond (1995) comprobaron cuán determinante era para la gestación del pretorianismo la ausencia de un orden civil y de una legitimación de las instituciones. Y en Martin (1985), Gershonil (1996) y Reno (1998) lo relevante para el caso de África es estudiar a los “señores de la guerra”. Para el caso latinoamericano, y desagregando por países, otros autores hicieron eje en el Porfirismo mexicano (Hernández Chávez, Gutiérrez Santos, Vanderwood), en el Castro-gomecismo venezolano (Ziems, Segnini, Irwin), en el Leguismo peruano (Astiz, Villanueva); y en el pretorianismo brasileiro (Simmons, Hunter, Hahner, Magalhaes, Pereira).<sup>8804</sup>

En el caso argentino, a diferencia de quienes hicieron hincapié en la construcción del orden nacional-republicano (1862-80), durante el período de la denominada Organización Nacional (Botana, Oszlak); hemos creído más relevante y acuciante analizar el período posterior, que fue previo al acceso del Radicalismo al poder (1916-1930), es decir poner énfasis en el período de la degeneración o involución de dicho orden nacional-republicano, o de la regresiva gestación del orden o pretorianismo oligárquicos (1874-90), es decir en el de su crisis o prolongado conflicto civil y militar, con su consiguiente ruptura del frente interno castrense (1890-1912). En nuestro estudio, centrado en el caso del Roquismo argentino (1880-1906), a diferencia de Rivarola y Perlmutter, concebimos al Roquismo no sólo como oligárquico sino también como esencialmente pretoriano, de un pretorianismo explícito, indirecto y árbitro, y no meramente potencial; y esa compleja caracterización la extendemos al caso del segundo Ministerio de Quintana, durante la presidencia de Luis Sáenz Peña (1893), y a las sucesivas presidencias de Roca (1880-86; 1898-1904), Juárez Celman (1886-90), Pellegrini (1890-1892), Uriburu (1894-98), Quintana (1905-06), Figueroa Alcorta (1906-10), y Roque Sáenz Peña (1910-12), a las que consideramos fuertemente dotadas de un pretorianismo tanto tácito o indirecto como secularizante.

En el sentido apuntado, paradójicamente Perlmutter se contradice, pues por un lado sostiene: “...que la llamada etapa del pretorianismo oligárquico, fue oligárquica pero no pretoriana”.<sup>8805</sup> Y por otro lado, nueve páginas más adelante, afirma taxativamente que Argentina “...desarrolló en el período 1889-1898 un tipo definido de pretorianismo militar moderno”.<sup>8806</sup> Amén de esta contradicción, refutamos diversas tesis que sostienen la existencia de una supuesta institucionalidad “estable y sólida” entre 1880 y 1930 (Rouquié); la de aquellos que remontan el origen de la crisis del 30 exclusivamente al último gobierno de Yrigoyen (Potash, Gasió); y la de aquellos otros que la reducen al influjo del profesionalismo Prusiano alimentado mediante la fundación de la Escuela Superior de Guerra en 1901 (Rouquié).

Finalmente, debe destacarse que este trabajo está centrado exclusivamente en las instituciones de la esfera de dominación militar, a escala nacional y a nivel terrestre o de ejército, y a sus estrechos vínculos con la esfera política dentro del modelo de autoritarismo moderno conocido en una de sus formas como pretorianismo, y trata

excepcionalmente su ligazón con actores e instituciones de los ámbitos o campos económico, social, educativo y religioso o eclesiástico, y sus respectivas estructuras lógicas.

## **0-II.- Batería de hipótesis**

Para entender la etiología de la tragedia que asoló América Latina a fines del siglo pasado (siglo XX) es preciso conocer los momentos de formación de la política y el ejército republicanos, con sus contradictorios ingredientes tradicionales (patriarcales, señoriales, prebendarios, mercantilistas, patrimonialistas y nepóticos) y elementos modernos (meritocráticos e ilustrados), los momentos de represión a los grupos revolucionarios que pretendían modificar las estructuras oligárquicas vigentes, como también de que manera se intentó perpetuar un pasado o como se produjo un retorno a épocas que se creían superadas. En ese sentido, la presencia de los ingredientes tradicionales, como testigos de la persistencia de la dominación tradicional, habrían sido los responsables de la deformación del orden republicano. El golpe de 1930 habría intentado un retorno al pasado conservador-oligárquico, y la revolución de 1890 habría pretendido una ruptura con dicho pasado y la búsqueda de un porvenir, que para algunos debían contener elementos proféticos.<sup>8807</sup> La genealogía sería el método de rastreo o búsqueda del origen próximo o remoto de la progresiva tragedia política, que se inició en 1930 y que alcanzó su cenit en la década del 70.

Para el estudio de estas violentas transiciones, habremos de examinar con detenimiento los mecanismos oligárquicos en la formación de dicho ejército republicano-moderno, las guerras y las revoluciones cívico-militares de 1890 y sus secuelas en 1891 en Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes, y el conato sedicioso en Formosa. En 1892, la Conspiración de Santa Catalina (Lomas de Zamora), en 1893 las revoluciones en San Luis, Santa Fé, Buenos Aires, Corrientes y Tucumán, y el movimiento insurreccional en Saladas, Empedrado y Goya (Corrientes). En 1904, el conato conspirativo en San Luis. Y en 1905 la Revolución en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, y la Masacre de Pirovano.

Para vencer los poderes condicionantes que impusieron los putschs o golpes de estado, es preciso entonces adoptar la estrategia de dividir o fraccionar los aparatos políticos y militares, pretorianos y cesaristas, y no cohesionarlos, y en ese sentido estudiar las relaciones cívico-militares y las propias instituciones militares, en tiempos de violencia originaria, conflicto interno, guerra étnica, revolución desde arriba, paz armada, democracia condicionada y restauración oligárquica, tales como los rituales de iniciación, las juntas revolucionarias, los consejos de guerra, las campañas expedicionarias, las juntas calificadoras, las logias secretas, las purgas militares, las comisiones armamentistas, las políticas de desarme provinciales, los juzgados de instrucción militares y la compleja e intrincada urdimbre de órdenes, informes, partes, boletines y memorias ministeriales.

En el largo período de erosión, degeneración y crisis del orden nacional-republicano (1880-1912), en el contexto global de una creciente dependencia neo-colonial de naturaleza imperial, se dio un régimen mixto donde coexistían dimensiones patrimonialistas y meritocráticas, y donde ocurrieron múltiples fenómenos históricos, tales como: a) la batería de desviaciones y perversiones (muertes, conatos de suicidio, sodomías, fugas, expulsiones y motines) acontecidas en las décadas iniciales de la

Guardia Nacional y el Colegio Militar (1860-1900); b) las conspiraciones, amagos sediciosos y revoluciones, ocurridas en 1874 y 1880, durante la crisis orgánica acontecida en el trienio revolucionario (1890-1893), y puntualmente en 1905, reprimidas con fusilamientos, bajas, prisiones, confinamientos y juicios sumarísimos; c) los debates sobre inteligencia militar y la falsa opción entre el servicio militar voluntario y venal o el servicio compulsivo y nacionalizante (conscripción); d) las polémicas sobre las insurrecciones cívico-militares; y e) las desviaciones y degeneraciones exógenas y endógenas, todas ellas fundadas en centenares de informes, memorias, declaraciones indagatorias y crónicas y editoriales periodísticas (1890-1892-1893-1904-1905-1932).

A esos efectos, analizaremos el rol de diferentes políticas neo-coloniales: las reproductoras, las transformadoras y las reformistas, las predatorias sobre las comunidades ágrafas o “pueblos sin historia”, las meritocráticas y simbólicas en la educación y el servicio civil, y las pretorianas en el seno del ejército y la guardia nacional. También estudiaremos los órdenes patrimonial-republicano y burocrático-oligárquico como rupturas con los imaginarios estamentales y burocrático-patrimoniales del orden colonial-absolutista así como con el imaginario caudillista pos-independentista; y como presupuestos del progreso modernizador (estrategias militar-colonizadoras y/o “misiones civilizatorias” en la frontera indígena, intervenciones federales en las provincias, instituciones educativas militares, servicio militar y políticas pedagógicas nacionalizantes, estrategias armamentistas de “paz armada”, políticas pacifistas de desarme oficial, y estructuras burocráticas deformadas).

Asimismo, indagaremos las sucesivas crisis, transiciones, transformaciones y reformas de dichos órdenes, desde un orden caudillista restaurador hasta un orden nacional-republicano, desde éste otro a un orden prebendario y oligárquico, y finalmente, desde este último a un creciente corporatismo militar nacionalizante en el seno de un orden burocrático-pretoriano. De significación para el estudio de estas violentas transiciones será analizar los dispositivos institucionales pretorianos mediante los cuales dichas crisis fueron conjuradas; o cómo las unidades militares fueron formadas, divididas, sublevadas, disueltas, refundidas y trasladadas; y sus cuerpos de jefes, oficiales, clases y soldados (voluntarios, enganchados, destinados y conscriptos), fueron desplazados, sumariados, procesados, condenados, ejecutados, torturados, exiliados, amnistiados y discriminados en sus pases, destinos y ascensos.

### **0-III.- Metodología.**

Para esta investigación, que es una prolongación de la obra electrónica titulada “Un Debate Histórico Inconcluso en América Latina” (<http://www.er-sagui.org>), nos basamos en el esquema de los tipos de dominación y las afinidades electivas de Weber, el método arqueológico-genealógico de Foucault, el modelo multipolar y acentrado de Deleuze y Guattari, la descripción densa de Geertz y Duch, la teoría de los fraccionamientos y la coaliciones de Przeworski, el paradigma indiciario de Ginzburg; las tipologías de los modelos de autoridad de los estados antiguo y moderno, de Dumézil, Kojève, Huntington y Perlmutter, el continuo apolítico-pretoriano de Magalhães, y la noción de enemigo interno de Esposito.

Asimismo, nos fundamos en fuentes documentales primarias tales como las fojas de servicio, los diarios de marcha, los sumarios y procesos, los copiadores de notas, los

partes diarios de la Capitanía General de Puertos, las ordenes del día, los diarios de sesiones, las crónicas y editoriales periodísticas, las biografías oficiales (Cutolo-Yaben); los listados de cadetes (Figuerola, 1996); la colección de leyes y decretos militares (Domínguez); los boletines, memorias y registros oficiales; la cartografía histórica (Punzi, 1997); y la fotografía histórica (Alexander, Cuarterolo y Toyos, 2001). También nos hemos fundado en una pirámide documental escalonada y selectiva compuesta en su base por partes diarios y semanales procedentes de las diversas unidades militares, en su meseta por boletines mensuales (Estado Mayor) y en su vértice superior por memorias anuales (Ministerio de Guerra), todo lo cual hallamos en el Archivo General del Ejército (AGE); en el Servicio Histórico del Ejército; en las Bibliotecas del Estado Mayor General del Ejército, del Círculo Militar y del Jockey Club; en las Hemerotecas del Museo Mitre y de las Bibliotecas Tornquist, Nacional y del Congreso, así como las de la Academia Nacional de la Historia, del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina (CEDINCI) y del Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España (Rosario); en el Departamento Patrimonio Histórico de la Secretaría de Extensión Universitaria del Colegio Militar de la Nación; en los Índices de sumarios del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; en las series correspondientes a la Capitanía General de Puertos y al Ministerio del Interior existentes en el Archivo General de la Nación (AGN); y en la colección fotográfica del Archivo Gráfico de la Nación.<sup>8808</sup>

#### **0-IV.- Diseño del Tomo.**

El tomo está dividido en cinco (5) secciones, y cada una de éstas en capítulos, totalizando diez y seis (16) capítulos, y más de un centenar de apartados y acápite, donde cada capítulo está identificado con su respectiva notación diferenciada. El tomo comienza con una breve introducción, seguida por la periodización, las interpretaciones, la metodología y las fuentes documentales analizadas.

En la primera sección tratamos una descripción de los órdenes meritocrático, predatorio e ilustrado en el seno de un modelo prebendario, así como el estudio de la persistencia de vestigios estamentales y patrimoniales, entre 1870 y 1890. A continuación sigue, en la segunda sección, con un desarrollo histórico del conspiracionismo cívico-militar revolucionario; el anti-acuerdismo y la fractura militar; y el abstencionismo armado y las estrategias y tácticas insurreccionales, tanto del período del ejército de veteranos enganchados como del de conscriptos, surgido este último a partir de la Ley Riccheri (1902). Más luego, en la tercera sección, el trabajo prosigue con la construcción de un orden oligárquico-pretoriano y la manipulación tecnológica, el corporatismo militar en la transición a un orden burocrático-pretoriano y su relación con las pautas éticas (disciplina, honor, liderazgo, camaradería), el escarmiento anti-sedicioso, y la formación del orden consensual de frontera o “misión civilizatoria” (1890-1912. Para concluir, el tomo se embarca en una cuarta sección, consistente en la estrategia, operaciones y logística como sustrato militar de la política pretoriana, el desviacionismo militarista exógeno (Prusianismo) como condicionante del pretorianismo neo-colonial, en el segregacionismo étnico como resultado de la burocracia pretoriana, y en la construcción del enemigo interno en el contexto de una Paz Armada. Cada capítulo constituye una unidad en sí mismo, y cada sección reúne un número de unidades que conservan entre sí una gran afinidad relativa.

El sumario, incluido al comienzo del tomo, resume una composición temática desplegada en diez y seis capítulos. Cada uno de dichos capítulos cuenta a su vez con sus índices respectivos, que se desagregan en numerosos apartados, acápite e ítems. De la colección de dichos índices se obtuvo un índice general y detallado de todo el tomo, que se ofrece a continuación; y a partir de este último índice general se ha seleccionado un repertorio de más de un centenar de palabras-claves, que ayudarán la labor de los buscadores en la web. Asimismo, la obra cuenta con más de un millar de notas que remiten a más de doscientos apéndices y listados, con una signatura cuya codificación introductoria se corresponde con los respectivos capítulos del texto, técnica heurística que me ha permitido la múltiple desagregación, desdoblamiento, enroque y reagrupación de secciones, capítulos, apartados, apéndices, tablas, listados, croquis y mapas.

## **Sección IV-A.- Persistencias de un orden patrimonialista y nepótico (1862-1890).**

La nación argentina emergió en Caseros (1852) de un orden o matriz institucional tradicional (caudillista y patrimonialista), donde imperaban ejércitos de milicias provinciales, con dispositivos de sustitución venal de los reclutados (mediante los denominados personeros), y con mecanismos de promoción consistentes en grados y ascensos, conferidos sin criterio racional ni meritocrático alguno, por las legislaturas provinciales y las propias autoridades militares, heredados de la disolución del ejército de línea, denominado entonces Ejército Republicano (1828).<sup>8809</sup>

Esa misma nación ingresó recién a partir de la batalla de Pavón (1862) a otro orden institucional de naturaleza mixta, con contradictorios ingredientes tradicionales (prebendarios y patrimonialistas) y modernos (meritocráticos e ilustrados), aparentemente incompatibles entre sí. En ese contradictorio orden existía la milicia cívica o ciudadana o guardia nacional, con sus dispositivos de licenciamiento del personal de mando, que promovía una circulación entre los mundos civil y militar, pero donde prevalecía un ejército de línea con oficiales ascendidos por el gobierno nacional mediante concursos, con jurados que priorizaban la antigüedad y el mérito, homologados con acuerdo del Senado; con instituciones educativas enderezadas a legitimar el ansiado monopolio de la violencia física, y con regimientos dotados de cajas administradas por oficiales habilitados, elegidos electoralmente en cada unidad, con las cuales se financiaban las respectivas cuotas de enganche.<sup>8810</sup>

En esta primera sección, dedicada a investigar la construcción de un orden meritocrático-predatorio (1862-1890), minado por la supervivencia de arquetipos de la modernidad absolutista, trato en cuatro capítulos consecutivos el análisis de los órdenes meritocrático y predatorio en el seno de un modelo prebendario así como el estudio de la persistencia de vestigios estamentales, patrimoniales y nepóticos.

## Capítulo IV-A-1

### **Mecanismos oligárquicos en el seno de un orden prebendario**

#### Índice del Capítulo 1

##### A-. Mecanismos oligárquicos en el seno de un orden prebendario

- A-I.- Guardia Nacional como dispositivo de una milicia ciudadana
- A-II.- Comisarios pagadores como dispositivo desigual del control de pagos.
- A-III.- Cajas y enganche como dispositivos de pago y reclutamiento (1862-91).
- A-IV.- Clientelismo militar como dispositivo prebendario de gratificación (1888).
- A-V.- Mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar como dispositivos prebendarios de promoción y beneficio (1892, 1908).
- A-VI. Comanditismo fraudulento en el aprovisionamiento de los ejércitos en operaciones o maniobras.
- A-VII.- Conclusiones

#### **Palabras Clave**

Clientelismo militar—comanditismo fraudulento--simonías—sinecuras--orden prebendario--Comisarios Pagadores--Cajas de regimientos—oficina de enganche--prevaricación militar--Dispositivo prebendario de gratificación--Mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar--Dispositivos prebendarios de promoción y beneficio

#### **Keywords.**

Military clientelism—military fraud--prebendary order—army exchequer—recruitment office—military prevarication—gratification dispositive—degree marketing—

### **A.- Mecanismos oligárquicos en el seno de un orden prebendario**

El surgimiento del estado-nación como evento liquidador de la dominación tradicional despótico-caudillista tuvo su necesario anclaje en el desarrollo de un capitalismo periférico. En un célebre reportaje, el historiador santafesino José Luis Busaniche afirmó en 1954 que el estado-nación oligárquico contrataba con el dinero procedente de los empréstitos extranjeros los contingentes de soldados enganchados (los mismos empréstitos con los cuales se estaba entonces practicando la partición y colonización de África), y fue mediante esos contingentes que se pudieron derrotar las insurrecciones de 1874, 1880 y 1890.<sup>8811</sup> Estos contingentes alcanzaron a la mitad del total de personal

civil y militar empleado por el estado nacional, que llegaba a más de diez mil individuos entre 1864 y 1879.<sup>8812</sup>

Analizaremos en este capítulo el rol de los dispositivos prebendarios y patrimonialistas como viejas persistencias de la dominación tradicional y como mecanismos responsables de la deformación del orden modernizante. Para ello subdividiremos este primer capítulo en seis rubros: a) guardias nacionales como dispositivo de una milicia cívica o ciudadana; b) comisarios pagadores como dispositivo desigual del control de pagos; c) cajas y enganche como dispositivos de pago y reclutamiento (1891); d) clientelismo militar como dispositivo prebendario de gratificación (1888); e) mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar como dispositivos prebendarios de promoción y beneficio (1892, 1908); y f) el comanditismo fraudulento en el aprovisionamiento de los ejércitos en operaciones o maniobras.

### **A-I. Guardia Nacional como dispositivo de una milicia ciudadana**

Durante mediados y fines del siglo XIX, la Argentina estuvo embarcada en un proceso de modernidad que a la postre resultó inconclusa, que se extendió también a sus instituciones militares. En ese sentido, la institución de la Guardia Nacional (GN) fue parte del menú emulado de las revoluciones americana y francesa.<sup>8813</sup> Para esa época, la Guardia Nacional era la negación del militarismo, pues consistía en una institución compuesta eminentemente por ciudadanos y no por súbditos de una monarquía o metrópoli colonialista. Formar en la Guardia Nacional constituía "...uno de los más altos deberes cívicos que el voto de los pueblos haya impuesto al ciudadano".<sup>8814</sup> Amén de ser la negación del militarismo, para la sociología estructural-funcionalista, representada por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, la milicia conjuntamente con las demás instituciones de la democracia liberal, proveían el necesario apoyo para el equilibrio del sistema político. La crisis o agotamiento de los paradigmas castrenses de raigambre liberal, sería para esta escuela de pensamiento la que se personificó en la pugna entre los ejércitos de milicias provinciales o Guardias Nacionales y los nacientes ejércitos profesionales de raigambre prusiana.

En el Río de la Plata, el origen de la milicia puede encontrarse en la Defensa y Reconquista de Buenos Aires, cuando las Invasiones Inglesas de 1806.<sup>8815</sup> Durante la presidencia de Rivadavia (1822) se intentó formalizar el reclutamiento de las milicias provinciales estableciéndose explícitamente la necesaria índole moral de las mismas.<sup>8816</sup> La Guardia Nacional y las legiones formadas por los integrantes de las comunidades extranjeras (españoles, italianos, franceses, alemanes, suizos) fueron la base sobre la cual se había movilizó la milicia porteña cuando el Estado de Buenos Aires se independizó de la Confederación Argentina en la Revolución del 11 de septiembre de 1852, y en las batallas de Cepeda y Pavón que sellaron la Unidad Nacional, y más tarde cuando se declaró la Guerra al Paraguay.<sup>8817</sup> Luego de Pavón, esta institución se extendió a lo largo y ancho del antiguo espacio Confederado.<sup>8818</sup> Posteriormente, con la derrota de Mitre en La Verde (1874) y de Carlos Tejedor en Barracas, Puente Alsina y Los Corrales (1880), se inició la lenta y larga decadencia de esta institución, que vino a redundar en beneficio de un proceso de profesionalización militar que se afincaba en los ejércitos de línea.<sup>8819</sup> También difirió la Guardia Nacional del servicio militar obligatorio que vino a instaurarse a comienzos del nuevo siglo veinte. Por ello, a

diferencia de lo que sostiene Nellar (1972), la Guardia Nacional no podía ser considerada el antecedente del Servicio Militar Obligatorio.<sup>8820</sup>

En la Guardia Nacional la instrucción estaba formada por un arsenal de rudimentos diversos: conferencias, ejercicios doctrinales, ejercicios de tiro, movilizaciones y maniobras en campaña, y las denominadas marchas de resistencia. Las conferencias eran dictadas en los Colegios Nacionales.<sup>8821</sup> Con respecto a los egresados de las universidades nacionales, se propuso la creación de cuerpos de ingenieros de la milicia ciudadana con oficiales diplomados en ellas.<sup>8822</sup> La concurrencia a los ejercicios doctrinales, que se producían sólo durante los fines de semana en las plazas de la república, era tanto un deber cívico como una obligación militar.<sup>8823</sup> Pero cuando el paraje elegido para los mismos era geográficamente apartado originaba toda suerte de cuestionamientos.<sup>8824</sup> Estos ejercicios se prestaban también a la difusión en algunos casos de un cierto fanatismo religioso.<sup>8825</sup> Los ejercicios de tiro se cumplían en los polígonos o campos de tiro, que en oportunidad de la Paz Armada crecían como hongos.<sup>8826</sup> Los campos de tiro no eran de fácil construcción, pues requerían de blancos y abrigos.<sup>8827</sup> Sin embargo, hubo quienes consideraban a los ejercicios más un deber cívico que uno de naturaleza puramente militar.<sup>8828</sup> Pero esto no era óbice para que los jóvenes asentados en la capital trataran de eludirla afincándose en lugares alejados de la provincia.<sup>8829</sup> Y aquellos que eran hijos de extranjeros trataran de servirse de la nacionalidad de sus padres.<sup>8830</sup> Las grandes movilizaciones y concentraciones de tropas eran también un ejercicio para probar la eficacia de la infraestructura logística.<sup>8831</sup>

El adiestramiento de los individuos en el manejo de las armas de fuego en las galerías o asociaciones de tiro, según *El Municipio*, alardeaba de hacerlos capaces en caso de guerra, "...de producir grandes bajas al enemigo, con su puntería certera adquirida, proporciona a la nación una falange numerosa de soldados utilísima y de superioridad incontestable. La proposición es inadmisibile después de un examen detenido".<sup>8832</sup>

En primer lugar, "¿Quiénes forman en las sociedades de tiro? Hasta ahora solo se ve figurar en las listas de adhesiones los nombres de personas conocidas, y la prensa que hace la propaganda insiste justamente sobre esa particularidad, a fin de probar el favor que la idea ha conquistado".<sup>8833</sup>

Las tendencias de todas esas sociedades de tiro se dirigían, a reunir en su seno elementos socialmente homogéneos, "...lo que en el caso quiere decir que los artesanos y gente humilde en general, no entrarán en la colectividad, no porque se les prohíba el ingreso, sino por la exclusión espontánea que se produce en los casos en que la pretendida aristocracia de estas repúblicas se apropia una idea y quiere llevarla adelante según sus inspiraciones".<sup>8834</sup>

Resultaba, entonces, que los llamados jóvenes decentes "...se dedicarán al ejercicio de tiro, con armas de la nación, protección oficial y general aplauso, formándose, hasta para la sagrada misión que todos tenemos de defender este suelo, una selección, sino de castas, (porque las diferencias de sangre serían inaveriguables, mal que pese a los nobles del día) por lo menos de posiciones y trajes. Síntoma grave en un país democrático, en que todos los ciudadanos deben concurrir por igual a los deberes del patriotismo".<sup>8835</sup>

Los cuerpos de la GN, abandonados por esa juventud selecta, "...quedan entonces destinados enteramente a los proletarios, que aprenderán a tirar al blanco en las ocasiones y forma que la instrucción militar señala".<sup>8836</sup>

Tendremos así, en nuestra tierra original, según *El Municipio* "...una división perfecta de clases, que en vez de dar cohesión a las filas ciudadanas en el caso de guerra, las debilitará, debilitando sobre todo a la patria, que requiere para su defensa soldados unidos y hermanados en toda intimidad. El desprecio que el dando afecta siempre en la vida privada por ese ser superior a él que se llama obrero, tomará cuerpo y color ofensivo con la formación de las legiones milicianas de gente decente salidas de las sociedades de tiro; y provocará la inevitable animadversión de los hijos del trabajo, que se regimentan silenciosos y obedientes en los cuerpos de la GN".<sup>8837</sup>

Es decir que en el momento del conflicto supremo, que es la guerra, la República Argentina "...se verá repartida entre patricios y plebeyos, con todas las odiosidades latentes que unos y otros alimentarán recíprocamente".<sup>8838</sup>

Si el grave aspecto moral de la iniciativa alcanzaba al extremo que *El Municipio* apenas esbozaba, "...sus efectos materiales no serán menos funestos".<sup>8839</sup> Los miembros de las sociedades de tiro "...burlan la ley que reglamenta los guardias nacionales, no inscribiéndose en los cuerpos que les corresponde, o yendo a hacerlo en otros de barrios lejanos, y dejan de asistir a los ejercicios doctrinales de unos u otros, porque consideran a salvo el deber, con la formación de las sociedades de tiro. En ellas, dicen se preparan también al servicio de la patria, aprendiendo a matar enemigos con precisión matemática".<sup>8840</sup>

Pero aún suponiendo, sostenía *El Municipio* que el miliciano "decente" "...conservé su maestría, y haga mosca a cada tiro, ¿es bastante esa habilidad para una campaña? Muy lejos de eso: el soldado debe conocer la táctica y la instrucción de cuartel, acostumbrarse a la disciplina severa, a las fatigas del vivac, de preferencia a todas las maneras de acertar el tiro".<sup>8841</sup> A cualquier general aguerrido que se le preguntara, "...que fuerzas preferiría, si tiradores indisciplinados, u hombres habituados a la obediencia militar, contestará que estos son mejor elemento que aquellos para el éxito de una campaña".<sup>8842</sup>

La conclusión de estas rápidas consideraciones se presenta para el editorialista de forma clarísima: "la creación de la sociedad de tiro, privando a la GN de uno de los elementos ciudadanos, deja de compensar con sus pretendidos beneficios, el defecto ocasionado".<sup>8843</sup> Los tiradores de moda "...no serán defensores tan útiles de la patria, como si aprendiesen a manejar las armas en las filas de la milicia; y su separación de las huestes milicianas crea una preferencia de clases que es insostenible en un país democrático".<sup>8844</sup>

El enrolamiento de la guardia nacional activa en toda la república, era de acuerdo con la Ley de mayo de 1865 (dictada pocos días después de declararse la guerra del Paraguay), obligatorio para todo ciudadano argentino, desde la edad de 17 años hasta la de 45, siendo casado y 50 siendo soltero.<sup>8845</sup> De esa obligación se exceptuaba a los altos funcionarios (ministros del ejecutivo nacional, gobernadores de provincia, y sus ministros, miembros de las legislaturas provinciales, jueces de la nación y provincias), y los que tuviesen imposibilidad física legalmente probada. La ley de reclutamiento, de

septiembre de 1872, disponía que “...los contingentes serán compuestos de guardias nacionales solteros de 18 a 45 años, designados por sorteo que se hará en cada localidad bajo la presidencia de un jurado, el cual entenderá de los reclamos que se interpongan y de cuya resolución se podrá reclamar ante los tribunales nacionales”.<sup>8846</sup>

Un cuarto de siglo más tarde, en 1895, la exoneración del servicio activo para los casados, trajo como consecuencia inmediata “la fiebre del matrimonio”.<sup>8847</sup> Eran para la prensa de entonces, “...muchos los que rechazaron los halagos y glorias de la vida militar y prefirieron, antes que exponerse al sorteo, cargar con la cruz y con la suegra”.<sup>8848</sup> Ordenados por el Congreso los ejercicios doctrinales, el P.E. dictó el 15 de diciembre de 1894 el decreto reglamentario de los mismos, disponiendo que “a los efectos del enrolamiento, convocatoria a ejercicios doctrinales y movilizaciones, debía dividirse la guardia nacional en activa, pasiva y territorial. De la activa debían formar parte todos los ciudadanos solteros comprendidos entre los 17 y 30 años de edad; de la reserva los que se hallen dentro de los 31 y 36 años y los casados de 18 a 39, y de la territorial los comprendidos entre los 27 y 45 casados y 40 siendo solteros”.<sup>8849</sup>

A semejanza del enganche, el voluntariado y los destinados, y no obstante los patrióticos objetivos prescriptos por la legislación, la Guardia Nacional padecía de una alta dosis de corrupción, y para erradicarla “...era necesario que su organización se independizara de la politiquería electoral”.<sup>8850</sup> Salvo contadas excepciones, los mandos de los regimientos eran conferidos a los cortesanos del oficialismo.<sup>8851</sup> En su conformación “...a veces hay doctores que ni entienden del manejo del fusil. Esos solo buscan de hacerse de capital electoral en sus parroquias, dando el puesto de oficiales a tenientes electorales”.<sup>8852</sup>

En ese sentido, el proyecto sobre reorganización de ejército permanente y de la guardia nacional que la Cámara de Diputados entró a discutir en agosto de 1895, venía a paliar el fracaso del enganche y el voluntariado, modificando substancialmente “...lo que la ley vigente venía rigiendo desde hacía muchos años, para las tres categorías en que se dividía la milicia ciudadana”.<sup>8853</sup> Pero el proyecto de la comisión de guerra modificó la ley de reclutamiento de 1872 y si bien la guardia nacional se dividió en tres categorías: activa, pasiva y territorial, no estableció mayor privilegio para los casados. Se declaró obligatorio el enrolamiento para todo ciudadano argentino de 17 hasta 40 años de edad, siendo casado y hasta 45 siendo soltero.<sup>8854</sup>

La Guardia Nacional activa entró a componerse “...de todos los ciudadanos de edad de 19 a 50 años cumplidos”.<sup>8855</sup> La guardia nacional de reserva “...la compondrán los ciudadanos de 31 a 35 años y, los individuos de tropa rebajados del ejército de línea cuya edad no exceda de los 35 años”.<sup>8856</sup> La guardia nacional territorial “...la formarán los ciudadanos de 36 a 40 años cumplidos siendo casados, y 45 siendo solteros, y los soldados rebajados del servicio permanente comprendidos en estas edades”.<sup>8857</sup> Los jóvenes de 17 y 18 años serán “...considerados de la territorial, pero en caso de movilización general, serán reunidos en cuerpos de recluta y servirán como tropas de reemplazo para reforzar el ejército activo en caso necesario”.<sup>8858</sup> Todos los años, todos los argentinos, que el año anterior hubieren cumplido 19 años, “...serán llamados a instrucción militar por cuarenta días, a contar del 1º de septiembre al 10 de octubre”.<sup>8859</sup> Durante ese tiempo, los guardias nacionales “...gozarán de los sueldos, racionamiento y vestuario que corresponda al ejército permanente”.<sup>8860</sup>

La inasistencia a los ejercicios doctrinales fue penada con una semana de ejercicios en el cuartel más próximo y las faltas de disciplina con quince días de ejercicios militares en un cuartel. Durante el período de los ejercicios la policía debía detener a los no enrolados, poniéndolos a la disposición de la autoridad militar más inmediata. Los infractores a la ley de enrolamiento eran penados con 500 pesos de multa o en su defecto obligados a servir un año en el ejército permanente sin perjuicio del enrolamiento en la guardia nacional en la categoría que les correspondía. El ciudadano que faltaba a los deberes que la ley le imponía, no podía desempeñar funciones ni empleos públicos nacionales, hasta que no hubiere sido rehabilitado por el cumplimiento de esos mismos deberes. Desaparecía así la excepción para el hijo de madre viuda o aquel de los hijos que atendía a la subsistencia de esta o de un padre septuagenario o impedido. Para los casados menores de 30 años que figuraban en la reserva, la sanción de una ley que los convertía de golpe en guardia activa producía una conmoción de efectos desastrosos y entre los solteros en edad de merecer, protestas tales que hizo poco envidiable la situación de los padres y abuelos.<sup>8861</sup>

El procedimiento adoptado a comienzos de 1896, por Resolución del Estado Mayor General del Ejército, para la designación de los ciudadanos que habían de mandar los cuerpos de milicias que en breve debían salir a campaña, "...no es sino la continuación de una práctica viciosa que da derecho para afirmar, que las cuestiones militares en nuestro país, están todavía subordinadas, en gran número de casos, tan sólo a un criterio antojadizo".<sup>8862</sup> El otro mal no era menos grave, "...pues desalienta y desilusiona a los argentinos que, ambiciosos de ocupar los honoríficos puestos de jefes y clases, oficiales de la guardia ciudadana, ven defraudadas sus legítimas y patrióticas aspiraciones y perdido, en estudios teóricos y prácticos, un tiempo que para la gran mayoría de ellos representa sacrificios, los que hoy, no les tiene en cuenta con la tan inusitada como arbitraria manera de efectuar los nombramientos".<sup>8863</sup> El editorialista de *El Tiempo* creía oportuno hacer notar al Estado Mayor, "...que ha cometido un indisculpable olvido, que entraña; por lo menos una desatención no haber ofrecido esos puestos [de mando], ya que no se discernían por concurso, a algunos de los varios jefes y oficiales que, no satisfechos con haber contribuido al sostén del honor y del orden del país, continúan prestando su valioso concurso veterano, para organizar la guardia de la Nación y que ostentan en sus pechos condecoraciones que representan servicios de sangre prestados a la patria".<sup>8864</sup>

En lo militar para poder mandar era necesario haber sido previamente mandado. Es decir, "...es necesario haber recorrido la escala; haber recorrido el trayecto en cuyo transcurso el soldado de fila ha sentido la influencia de ese otro soldado progresista. El soldado de fila, ha obedecido la autoridad relativa del cabo, después la de ese mismo cabo convertido en sargento, a quien por el rol de sus funciones y el contacto casi inmediato, ha debido recurrir en cualquier ocasión del servicio".<sup>8865</sup> No menos angustiante era el tema de los nombramientos y los ascensos en la Guardia Nacional, pues tenía hondamente preocupados a los entendidos en la milicia ciudadana.<sup>8866</sup> Sostenían que "...sería bueno que el Estado Mayor tomase medidas acerca de los ascensos que los coroneles de regimientos confieren sobre el mismo campo de instrucción. Ayer se dio el caso de que un subteniente hacia las veces de capitán, sin preparación para ello y sólo por favoritismo".<sup>8867</sup> Finalmente, a los efectos de cubrir todos estos deficits, Carlos Pellegrini propuso la creación de las Academias de Guardia Nacional con asiento en las mayorías de las correspondientes unidades militares.<sup>8868</sup> Los oficiales egresados de las mismas cubrirían la demanda de los batallones. Pero como en

la Guardia Nacional no había servicio de guarnición ni servicio interno de los cuerpos el número de oficiales requerido era menor que en el ejército de línea.<sup>8869</sup>

El Estado Mayor General del Ejército que tanto empeño había puesto en la organización del ejército y la guardia nacional confeccionó entonces un programa "...al que debían sujetarse los estudios de los que deseaban ser oficiales de la milicia ciudadana, que es verdaderamente monstruoso por la variedad y extensión de las materias que contiene".<sup>8870</sup> Al confeccionarlo "...no se ha tenido en cuenta que la oficialidad de la Guardia Nacional tiene un carácter transitorio, no estando destinada a perfeccionarse constantemente en el arte de la guerra ni tampoco a instruir y dirigir soldados permanentes que necesiten conocer a fondo todas las materias que no pueden ser dominadas sino por los que han constituido su especialidad de ellas".<sup>8871</sup> Además, un oficial de guardia nacional "...jamás va a ser jefe superior en una acción de guerra, porque para eso están los jefes de línea bajo las órdenes de los cuales se opera siempre".<sup>8872</sup> Hacer programas que no pueden estudiarse era altamente inconveniente. Un oficial de GN no necesitaba "...conocer las distintas clases de pólvora, su fuerza de expansión, el pie de organización de los principales ejércitos europeos, táctica comparada, conocimientos detallados sobre fortificación, etc".<sup>8873</sup> Bastaba con que los oficiales conocieran "...la táctica de nuestro ejército, nociones generales y conocimientos prácticos del tiro de guerra, servicio de campaña como ser guardias avanzadas, etc. Y nada más".<sup>8874</sup>

El programa de instrucción contenía rubros muy sofisticados. El periodista de *El Tiempo* inquiría "...¿Cómo pueden esos ciudadanos aspirantes, contestar a las exigencias de un programa que contiene en sus renglones, materias exclusivamente consultables en la notable obra de Galardón, cuando ningún oficial competente se ha encargado de explicarles con la experiencia del oficio, los tecnicismos obligados del arte militar, ni las complicadas conclusiones a que llega tan experimentado escritor militar?" ¿Y cree Vd. acaso, que en estos países de habla española, los argentinos de su regimiento saben todos leer esa obra escrita en francés y de la que no se conoce ninguna versión castellana? ¿Y esos aspirantes, pueden, en el caso de que posean el idioma de redacción del citado tratado de artillería, costearse esa costosa obra?"<sup>8875</sup>

Finalmente, la nota periodística la constituía la persecución a los infractores o "inasistentes" al enrolamiento, la que se practicaba en los lugares de recreación pública, tales como el Hipódromo de Palermo, considerado entonces el nidal de los remisos. Pasado el mediodía de una jornada turfística, el primer batallón del regimiento 11 de G. N., al mando del teniente coronel Montes de Oca y del Mayor Correa, "...había salido del cuartel del 3 de línea, marchando a la sordina. Una lluvia persistente había puesto intransitable la Avenida Alvear y allá va la tropa saltando charcos, embarrándose hasta los tobillos, pero alegre y decidora, ¡Que diablos! A la pesca de infractores!"<sup>8876</sup> Llegados a los portones del hipódromo se dio la orden de que nadie saliera. La primera compañía "...ocupó las tribunas, la segunda puso centinelas en los patios, pista y adyacencias; la tercera en las entradas principales y la cuarta, al trote, atravesó una larga extensión de campo, y ocupó la estación del ferrocarril, estableciendo un cordón de imaginarias a lo largo del alambrado".<sup>8877</sup> La persecución había comenzado. En las tribunas asomaban "...caras pálidas e inquietas y las carreras ya no interesaban. Algunos remolineaban tanteando sus documentos, otros buscaban salidas, pero en los portones no se distinguían mas que centinelas muy serios, con su mauser al hombro".<sup>8878</sup>

## A-II. Comisarios Pagadores como dispositivo desigual del control de pagos.

Para el pago del prest y del rancho prevalecía en la Confederación Argentina el viejo sistema de los comisarios pagadores. Y cuando durante la Confederación Argentina, el pago del prest de la tropa languidecía, fue preciso acudir al préstamo usurario de los financistas foráneos.<sup>8879</sup> En ese sentido el Ministro de Hacienda había ordenado al financista francés José de Buschental, residente en Montevideo, representante de la Casa Mauá, que entregase al Comandante General de Frontera sobre el Chaco la suma de 11.050 pesos a la vista, para el pago “...de libramientos impagos existentes en poder del referido Comandante General, cuyos libramientos serán remitidos oportunamente por dicho Gefe al Ministerio de Guerra”.<sup>8880</sup>

Y para compensar la escasez e irregularidad del prest y del rancho, en las regiones de frontera la tropa y los oficiales participaban en la asignación de lotes en los ejidos de las guarniciones, espacios donde podían cultivar sus propios medios de subsistencia.<sup>8881</sup> En cada uno de los puntos que debían ocupar las guardias de la nueva frontera sobre el Chaco, se concedió a éstas y se destinó a la colonización espontánea de esos lugares, “...un área de dos leguas, cuya repartición se haría del modo siguiente: 20 cuadradas a cada individuo de tropa, 40 cuadradas a cada oficial, y 80 cuadradas a cada jefe que haya permanecido cinco años en la nueva frontera. Los jefes y oficiales que tuviesen al cabo de este término, recursos o medios suficientes para plantear establecimientos de mayor importancia, serán acreedores a mayor cantidad de tierra que les concederá el Gobierno Nacional en las inmediaciones del área afectada a los fuertes”.<sup>8882</sup>

No obstante la aparente transparencia del mecanismo de los comisarios pagadores, éste ofrecía para el Coronel Nicolás Martínez Fontes --en un documento fechado en 1860-- la dificultad de recargar el presupuesto de Guerra “...con los sueldos de tantos Comisarios pagadores cuantas son las fracciones en que está subdividido el ejército y por las largas distancias que median de unas a otras, la rendición de cuentas no sería uniforme ni habría exactitud en presentarlas”.<sup>8883</sup>

Asimismo, el sistema de los comisarios pagadores entorpecía el orden de los pagos, porque cuando en los momentos del pago uno o varios soldados se hallaban ausentes, los comisarios --que están en el deber de abonar en tabla y mano propia el prest del soldado, único recurso con que cuenta para atender las necesidades de familia-- “...se resistían a dejar en poder del jefe del cuerpo el haber de uno o más individuos”.<sup>8884</sup> Esta resistencia de los comisarios pagadores ponía en tela de juicio la probidad de los jefes de los cuerpos, “...cuando ésta nunca debía estar en duda, pues si tal fuese la integridad de un jefe de cuerpo también lo sería la de un comisario pagador”.<sup>8885</sup> El jefe de cuerpo que era capaz de llenar cumplidamente las responsabilidades de su empleo, también “...debe serlo para responder a los caudales de su tropa; y así como las ordenanzas señalan penas para otros crímenes, también las tiene para el que disponga de los intereses de sus soldados si los malversa o los destina a objetos particulares”.<sup>8886</sup> Muchas otras razones podían aducirse para reprobar el sistema de comisarios pagadores, como objetable desde el punto de vista de la economía, la integridad, la puntualidad y la exactitud en la rendición de cuentas.<sup>8887</sup>

### A-III. Cajas y enganche como dispositivos de pago y reclutamiento (1862-91).

El sistema vigente en el pago de sueldos era de una naturaleza patrimonialista, y consistía en las Cajas Militares de los Cuerpos.<sup>8888</sup> El Coronel Martínez Fontes concluía que "...el medio más eficaz para la buena administración de los caudales de los cuerpos, es disponer que los jefes de ellos procedan al nombramiento de capitanes cajeros y oficiales habilitados".<sup>8889</sup> Su nombramiento debía ser hecho "...a votación en reunión general de jefes y oficiales en cada cuerpo; que el sargento mayor extienda un acta en que han de darse los votos, y hecho el escrutinio se cierre esta con el nombramiento o declaración de los oficiales en quienes hubiese recaído la elección, la cual elevará el jefe principal a la Inspección General con nota pidiendo su aprobación o exponiendo los motivos que tenga para reprobar a los nombrados".<sup>8890</sup>

Como medida peculiar de este sistema se debían disponer "...tres llaves para la caja del cuerpo, una para el jefe de él, otra para el sargento mayor y la otra para el capitán cajero: que el oficial habilitado reciba los fondos de prest y rancho, y a presencia de los jefes del cuerpo los entregue al capitán cajero quien anotará inmediatamente las cantidades que reciba en el libro de cuenta corriente que llevará de caja".<sup>8891</sup> Este capitán cajero debería presentar al jefe del cuerpo "...cada 15 del mes un estado de cuenta corriente de la caja, haya o no habido operaciones de entrada o salida de fondos: que el mismo capitán cajero forme las cuentas de inversión 5 días después del pago, y examinadas por el jefe del cuerpo las eleve éste a la Inspección General para su aprobación, como lo hará también del estado mensual de la caja".<sup>8892</sup> Para Martínez Fontes, los jefes de los cuerpos "...no puedan disponer de los fondos de caja sin previa autorización de la Inspección General, pidiéndola al efecto toda vez que consideren necesario disponer de fondos para emplearlos en servicio del cuerpo, cuyas sumas figurarán en los objetos que se han invertido en los estados mensuales que se elevan a la Inspección".<sup>8893</sup>

Una vez adoptado, después de Pavón (1862), el régimen de las Cajas Militares de los Cuerpos, y de la elección y escrutinio en cada unidad de los oficiales habilitados, comenzó la manipulación de estos dineros para alimentar la cuota de enganche. El reclutamiento mercenario de enganchados, a nivel de tropa, estuvo a partir de entonces marcado por una constante serie de promiscuidades y corruptelas propias de todo dispositivo patrimonialista.<sup>8894</sup> Su momento de mayor gloria fue durante la Guerra de la Triple Alianza, que en 1867 alcanzó la cifra de 95 voluntarios contratados en Génova.<sup>8895</sup> En el Decreto que reglamentó la Ley de reclutamiento, de Septiembre de 1872, durante la presidencia de Sarmiento, la cuota de enganche alcanzó los doscientos cuarenta pesos fuertes.<sup>8896</sup> Si bien los oficiales cajeros y habilitados no eran propietarios de los dineros que manejaban, la discrecionalidad con que practicaban su administración se asemejaba en mucho al dominio privado.<sup>8897</sup> Por ello, el administrar estas cajas como si fueran una cuestión privada, y hasta personal, contribuye a que se las defina como una institución patrimonialista.<sup>8898</sup>

Concurrentemente, el apogeo patrimonialista que significaron las Cajas de los cuerpos militares coincidió también con la época de los empréstitos externos y con la inmigración masiva europea, la cual al desplazar al elemento criollo (mestizo, mulato) del mercado del peonaje rural, lo volcó a este último decididamente a favor de casi la única alternativa laboral que le quedaba: el Enganche.<sup>8899</sup>

Las acusaciones más graves fueron las relacionadas con la administración de la cuota de enganche y el uso político que se hacía de las Oficinas de Enganche.<sup>8900</sup> En la defensa del Teniente Coronel Nicanor Pico ante el Consejo de Guerra, su patrocinante el Capitán Manuel D. Álvarez, declaró en 1892 --contra las acusaciones del Fiscal Alejandro Mombello (el mismo que participó de la represión en 1905)-- que en las cajas de los regimientos administradas por los oficiales habilitados se economizaban las raciones o rancho de los soldados para poder servir las cuotas de enganche.<sup>8901</sup> Álvarez afirmaba que esto se "...hace en todos los cuerpos del ejército de modo que si prevalecían las teorías del Fiscal Mombello sobre malversación de caudales no hay un solo jefe del ejército que no haya cometido un delito".<sup>8902</sup> Consecuentemente, no es extraño que al dispositivo del enganche se lo tuviera como causa generadora de la enorme masa de desertores.<sup>8903</sup> Por ello, y para evitar ese fenómeno desquiciador, en el campamento militar de Santa Catalina, inmenso predio ubicado en Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires), y en otros cuarteles del interior del país, se permitía que convivieran junto a la tropa y las clases gran número de cuarteleros y familias pertenecientes a los mismos.<sup>8904</sup>

Justamente, para corregir estos desaguizados patrimonialistas e intentar instalar un régimen más racional e impersonal, primero se fundó en Río IV (Córdoba), en 1891, el Depósito de Reclutas; cuatro años después se intentó crear las Intendencias de Enganche; y diez años más tarde, en 1901, entre otros motivos para ahorrarle al fisco la cuota de enganche, se consagró la Ley de Servicio Militar Obligatorio (Ley 4031).<sup>8905</sup> Esta nueva institución del Depósito vino teóricamente a suplantarse las Comisiones u Oficinas de Enganche.<sup>8906</sup> La tropa enganchada padecía de enormes anomalías, tales como enfermos, menores de edad, y escuálidos de todo tipo.<sup>8907</sup> Históricamente, según Miller (2005), los tipos corporales (talla, grosor, peso) no han estado, distribuidos al azar a lo largo de las fronteras de clases y de etnias.<sup>8908</sup> Según Recluta, seudónimo del periodista Saturnino Álvarez Cortés, en un centro o depósito donde se efectúe la recluta general para todo el ejército, sería más fácil administrar la distribución racionalmente, según talla y peso. Los reclutados irán "...cada uno al arma que por su talla y condiciones físicas les corresponda, y no sucederá lo que hoy, que vemos en Infantería soldados de una talla tan elevada, que peca ya en ridícula, precisamente cuando en esta arma lo que se necesita son hombres de pequeña estatura, fornidos y con un desarrollo físico proporcionado".<sup>8909</sup> Por el contrario, en la caballería se veían "...soldados que ni a la crin del caballo alcanzan, y para montar, si se les obliga a hacerlo reglamentariamente, no podrían. Inútil decir que la instrucción de lanza y sable no puede ser perfecta debida a la poca extensión del brazo y del cuerpo. Pié a tierra necesitan llevar suspendido el sable, pues colgado les arrastra".<sup>8910</sup>

Los más acérrimos adversarios del Depósito fueron primero "...los cuerpos [de ejército], porque indudablemente no les convenía su existencia, querían seguir con el sistema antiguo de mandar comisiones de enganche, de las que se decía, que al día siguiente de llegar al punto de su destino acusaban el alta de 50 enganchados, que tardaban en reunirse días, semanas y meses, pero que desde el primer día eran otras tantas plazas presentes en el batallón, y con el depósito no podía suceder eso".<sup>8911</sup>

Sin embargo, organizado el Depósito de Reclutas en debida forma, habría sido extremadamente conveniente, en primer lugar porque los cuerpos "...se evitarían de mandar esas comisiones de enganche, que se eternizan en las provincias sin grandes

resultados, y produciendo gastos que son pagados por el batallón cuando este no tiene fondos para el objeto”.<sup>8912</sup> En segundo lugar, porque los cuerpos “...podrían reemplazar sus bajas siempre que fuera necesario con soldados instruidos y con cierta educación militar, pues en el depósito, libre de todo servicio de guarnición, sin tener que asistir a paradas, ni intervenir en elecciones, podría recibir aquella mejor que en los cuerpos”.<sup>8913</sup>

El sistema del enganche tenía este vicio orgánico incurable: “...no puede atraer sino a los que no se sienten con fuerzas para triunfar en la lucha por la vida. De ahí el germen de su inferioridad”.<sup>8914</sup> ¿Cómo remediar ese grave mal? ¿Aumentando el sueldo? Pero jamás podrá igualarse al salario del trabajador libre, en un país donde cualquier peón de campo gana \$30 con casa y comida, y donde se cosecha maíz a 1\$ por fanega. Y aún igualando el sueldo ¿cómo compensar la esclavitud forzosa del cuartel con la libertad de la vida independiente? No había que hacerse ilusiones, expresaba el periodista del diario *El Tiempo*. Es cierto que el sueldo del soldado debe estar en proporción con el salario del trabajador libre, por razones de obvia justicia. Pero con eso no lograremos remontar nuestros cuerpos de línea como es debido.<sup>8915</sup> Según dicho periodista, había que desengañarse: “...no hay otro remedio que recurrir al servicio militar obligatorio. Es urgente dictar esa ley, es indispensable que las filas del ejército y las tripulaciones de nuestros barcos se compongan de argentinos. La medida se impone”.<sup>8916</sup>

Amén de su baja autoestima, muchos de los que se enganchaban padecían de enfermedades crónicas, “...eran asmáticos o reumáticos, dolencias que asumen carácter gravísimo con la vida a la intemperie y durmiendo en terrenos bajos y húmedos como los que ocupa el campamento de Santa Catalina”.<sup>8917</sup> Por cuanto costaban mucho dinero al tesoro, “...los alcohólicos, los tuberculosos, los de constitución débil, los reumáticos o asmáticos no debían ser admitidos bajo ningún concepto”.<sup>8918</sup> No era sólo la asistencia médica lo que costaba. Cada uno de esos individuos “...inutiliza un uniforme y devenga sueldo y prets mientras dura su enfermedad y ocasiona una baja en las filas, lo que es más grave”.<sup>8919</sup> Debe tenerse, también, especial cuidado en elegir los enganchados entre aquellos que no tengan menos de veinte años ni sean mayores de treinta y luego destinarlo al arma para que demuestre mayores aptitudes.<sup>8920</sup>

En efecto, los militares encargados de hacer el enganche, se encuentran con que nadie se deja seducir por la carrera, pero como no es posible que funcionen esas oficinas sin resultado de ninguna especie, apelan a medios completamente reprochables.<sup>8921</sup> El periódico *El Tiempo* había presentado varios ejemplos de “...abusos cometidos por las oficinas de enganche en ésta, verdaderas cacerías humanas, que dan una triste idea de nuestra organización militar, y prevemos que llegará a suceder lo mismo respecto de las oficinas de enganche con que se nos amenaza de nuevo”.<sup>8922</sup>

#### **A-IV. Clientelismo militar como dispositivo prebendario de gratificación (1888).**

Los certificados o premios de tierras fueron un expediente prebendario de vieja data en la historia argentina, que excedía con creces la distribución de lotes en las guarniciones de frontera, y que se otorgaba a aquellos oficiales que se tenía como clientes políticos. Al Jefe de Guardias Nacionales Manuel Antonio Espinosa, en mérito a su rol en la batalla de Santa Rosa (1874), se le donaron 24 leguas de campo en el Departamento Gral. Roca (sur de Córdoba), donde fundó un establecimiento modelo en su época, fué Jefe Político del Gobernador Demetrio Pizarro, y Diputado Nacional en 1886.<sup>8923</sup> Y en 1888, en el

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, en la sesión nº 52 del 28 de septiembre, el Poder Ejecutivo propuso vender a precio vil tierras fiscales a oficiales del ejército en actividad.<sup>8924</sup>

Los militares beneficiados en esta ocasión, de los cuales sólo algunos pocos se transformaron en estancieros y, por ende, en parte del sistema de dominación económica fundado en la explotación agropecuaria y en la apropiación de la renta agroganadera, fueron los generales Napoleón Uriburu (AGE, Leg.13.204) y Juan Ayala (Leg.120) con cinco leguas a cada uno; los coroneles Alvaro Barros (Leg.1470), Manuel Fernandez Oro (Leg.4510), Enrique Spika (Leg.12.672), Juan F. Czetetz (Leg.3551), Santiago Baibiene (Leg.1238) y Nicolás Barros (Leg.1475), con cuatro leguas a cada uno; y los tenientes coroneles Benjamin Sastre (Leg.12.166), José M. García (Leg.5140), Rómulo Parkinson, Julio Ruiz Moreno (Leg.11.683), Tristan Amparón (Leg.715), Ponciano Torres (Leg.13.077), con tres leguas cada uno. Otro proyecto amplía la nómina e incluye con cinco leguas cada uno a los generales José M Bustillo (Leg.2238), Teodoro García (Leg.5211), Francisco B. Bosch (Leg.1984) y Zacarias Suspiche (Leg.12.771); con cuatro leguas a los coroneles Froilán Leyria (Leg.6855/56), Federico Mitre (Leg.8194), Felix Benavides (Leg.1660), Eudoro Balza (Leg.1319), Remigio Gil (Leg.5330) y Trifón Cárdenas (Leg.2606); y tres leguas a los tenientes coroneles Julio S. Dantas (Leg.3653) y Juan Miguel Facio (Leg.4352).

Estos eran los proyectos originales, pero luego se produce una interesante polémica parlamentaria entre Lucio Mansilla y Domingo F. Sarmiento porque este último quiere incluir al coronel José Inocencio Arias (Leg.117), hermano del General Amaro Arias, pero Mansilla se opone porque Arias ya no estaba en el ejército, dado de baja por haber participado en los sucesos del 80 del lado del gobernador Carlos Tejedor, y ya no correspondía, en su opinión, llamarlo Coronel porque era nada más que un simple ciudadano y como tal no le correspondía el beneficio con el que el Congreso estaba premiando a los otros militares. En realidad, para Meabe estaban "...comprando sus conciencias porque el precio era vil y esto queda claro en el debate".<sup>8925</sup> A tal punto se evidencia el escarnio de la compra de conciencias o simonía militar y de incorporación económica al sistema de dominación como tributarios de la renta agroganadera que el propio general Bosch se presenta en el recinto y como hombre de honor, habla en su nombre y en el del general Teodoro García y del coronel Julio Dantas, solicitando se lo excluya expresamente de ese beneficio. Luego interviene el propio Dantas y reafirma lo solicitado por Bosch. Resulta notable como Mansilla va agregando luego nombres a la lista y lo mismo lo hace el diputado Estanislao Zeballos que pide favorecer a su compadre el coronel Genaro Racedo (Leg.10.607), el diputado Molina que pide por el coronel Enrique Godoy (Leg.14985), el diputado Soler que pide por el coronel Expedicionario del Chaco Manuel Sosa (Leg.12.607), el diputado Obligado que pide por el coronel Juan Carlos Boerr (Leg.1927), y así siguen las inclusiones con los pedidos de Mansilla por los coroneles Pedro Palavecino (Leg.9546), Salvador Tula (Leg.13.131) y Patrocinio Recabarren. (Leg.10.791)

Contrariando su postura principista, el propio Bosch interviene para pedir por su antiguo cliente el Sargento Mayor Pedro Godoy (Leg.15.413), que era en ese momento edecán del presidente de la República. Lo que queda en evidencia en esta 52ª sesión de la Cámara de Diputados es que se premia con tierras publicas a militares en actividad vendiéndoles a precio vil o, mejor aún, regalando tierras públicas y aparentando una venta pero solo a militares en actividad.<sup>8926</sup> La polémica en torno al coronel Arias que

ya no revistaba en el servicio militar activo es para el Dr. Joaquín Meabe "...la clave de bóveda del mecanismo subyacente que compra las conciencias militares con tierras incorporando a los militares al dispositivo de dominación económica que a su vez sostiene el poder real".<sup>8927</sup> Al hacerles participar de la renta agroganadera se les impone una necesaria complicidad. Según Meabe, los jefes Bosch y Dantas parecen advertir algo de esto y piden ser excluidos del beneficio. Finalmente, un decreto del Presidente José Evaristo Uriburu suspendió toda solicitud al respecto.<sup>8928</sup>

Años más tarde, otros oficiales reclamaron también ser acogidos por la legislación que acordaba premios en tierras. En 1905, el Teniente Coronel Higinio Vallejos, autor de un libro sobre Telegrafía Militar, elevó una nota al Ministro reclamando el premio en tierras. De resultas de su solicitud y de las consideraciones que incluyó en la misma fue arrestado en el Cuartel de Palermo.<sup>8929</sup> A propósito de dicho arresto, Vallejos le pide reconsideración al Ministro de Guerra Gral. E. Godoy, manifestando que "...si fuera aceptado el criterio de que los gobiernos tienen correlación entre sí [el principio de seguridad jurídica], resultaría que los militares no podrían ser biógrafos o historiadores de su país, por que en sus relatos podían rozar o criticar la acción, ya sea política o administrativa que hayan tenido gobiernos de otras épocas. Entrando pues en esta corriente el Código Militar no solo sería aplicable al personal docente del Ejército y en sus relaciones con las autoridades constituidas, sino también tendrían efectos retroactivos".<sup>8930</sup>

#### **A-V. Mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar como dispositivos prebendarios de promoción y beneficio (1892, 1908).**

Los ascensos, pases y destinos fueron siempre mecanismos que se prestaban a negociaciones espúreas, como lo hemos visto recién con los premios de tierras discutidos por el Parlamento en 1888 y en 1893, pero nunca con la intensidad manifestada durante y a posteriori de la Revolución del 90.<sup>8931</sup> Al día siguiente de dicha Revolución, para Grapho, posible seudónimo de un militar que bien podría tratarse del oriental Diego Lamas, periodista de *El Diario*, órgano que aunque dirigido por Manuel Láinez expresaba en ese momento los intereses políticos del ex candidato presidencial y ex gobernador Dardo Rocha, "...ya se pudo prever por las iniciativas rumbosas y complacientes que se tomaron, que el cisma y las bajas emulaciones que provoca la injusticia en la adjudicación de grados y recompensas, iba a infundir en el ejército un ambiente maléfico de anarquía y de rivalidad".<sup>8932</sup> En el momento en que más necesario era retemplar el sentimiento austero del deber militar, era "...cuando precisamente el **favoritismo torpe y dadivoso** se empeñaba en relajar la regla inflexible de la disciplina y el espíritu marcial que infunde, y sin el cual, la fuerza armada se disloca y desorganiza, tendiendo a degenerar en soldadesca".<sup>8933</sup>

Hemos visto y debemos decirlo sin embozo, sostenía Grapho o Lamas, testigo de cargo por cuanto estaba destinado en el Estado Mayor del Ejército, que "...la **cortesanía militar** ha sido una corruptela fomentada en las mismas antesalas ministeriales; allí han acudido todos los que querían propiciarse la gracia dispensadora de los grados y honores, y allí hemos visto formarse el foco de intrigas, semillero de chismes que ha convertido la repartición en pandemonium ingobernable, introduciendo la cizaña entre el personal que por sus funciones debía cooperar en la tarea de levantar el nivel militar

de un ejército trabajado por fuerzas intestinas que tendían a debilitar el nervio que da solidaridad y poder a la milicia de línea”.<sup>8934</sup>

Inmediatamente después de levantado el estado de sitio, que se había promulgado con motivo de la Revolución de Julio de 1890, y como resultado de una política de genuflexión y vasallaje y difundido mediante un sistema de información corporativa (Boletines del Estado Mayor) se promovió al empleo inmediato superior por Decreto del 16 de agosto a más de un centenar de Jefes y Oficiales comprendidos en la Ley de Ascensos.<sup>8935</sup> Quince días más tarde, el 1 de septiembre de 1890 se dicta el Decreto de Reincorporación, y el 5 de septiembre, el Ministro de Guerra Nicolás Levalle dispone en una Resolución que revisten “en la forma que se expresa” un centenar de Jefes y Oficiales que vuelven al Ejército en virtud de la Amnistía General legislada el 26 de agosto de 1890.<sup>8936</sup> Después de un año, el 31 de diciembre de 1891, se volvió a decretar la promoción al empleo inmediato superior a otro centenar de Oficiales del Ejército (24 de artillería, 68 de infantería, y 33 de caballería).<sup>8937</sup> Otros dos meses más tarde, el 3 de febrero de 1892, se volvió a decretar la promoción al empleo inmediato superior a más de una treintena de Oficiales y Sargentos distinguidos (30 de infantería, 4 de artillería, y 2 de caballería).<sup>8938</sup> Dicha promoción se repitió el 1º de septiembre de 1892 con casi trescientos oficiales subalternos (67 de artillería, 129 de infantería y 101 de caballería).<sup>8939</sup> Y un mes después, el 30 de septiembre de 1892, se volvió a promover a otro centenar de Jefes y Oficiales (63 de infantería, 33 de caballería y 20 de artillería).<sup>8940</sup> Y como broche final, a fines de 1893, se incurre en un generalizado uso y abuso de condecoraciones militares.<sup>8941</sup>

El grueso del favoritismo estuvo dirigido a quebrar las armas más rebeldes, como la artillería y en segundo lugar la infantería. De todos los oficiales ascendidos he podido detectar leyendo con detalle los decretos mencionados a una decena de oficiales subalternos del arma de artillería (Cané, Arce, Vicat, Freixá, Moscarda, Perón, Vértiz, Maglione), a media docena del arma de infantería (Góngora, Lafleur, Lugones, Mors, Sassi, Ocampo) y a uno sólo del arma de caballería (Oyarzú), que fueron raudamente ascendidos en el curso de un par de años desde cadetes del 4º y 5º año del Colegio Militar hasta el grado de Teniente 1º.

Los grados, los honores, las recompensas en tierra “...se han marchanteado con un favoritismo que no ha podido menos que relajar la disciplina, no la disciplina mecánica como la entiende el ministro, que se consagra a impartir órdenes y hacerlas obedecer, no, nos referimos a esa alta disciplina, que cultiva las virtudes militares, infundiendo en el soldado un temple marcial que da a la obediencia por estímulo el sentimiento del deber y de las nobles emulaciones”.<sup>8942</sup> Las recompensas en tierras se otorgaron con toda clase de concupiscencias.<sup>8943</sup> Incluso resultaron favorecidos quienes apenas fueron militares, y ni siquiera actuaron en la denominada Conquista del Desierto.<sup>8944</sup>

Finalmente, el colmo de la corrupción se dio con el mercadeo de las excepciones al servicio militar.<sup>8945</sup> Entre muchos otros, los casos salientes fueron los del Comandante José Supisiche ocurrido en 1908; y el del General Patricio Azcurra, que fuera edecán del General Nicolás Levalle, cuando oficiaba como Ministro de Guerra del gobierno de Carlos Pellegrini (1892), a quien veinte años después, en 1914, lo despojaron del grado y del uso del uniforme.<sup>8946</sup>

#### **A-VI. Comanditismo fraudulento en el aprovisionamiento de los ejércitos en operaciones o maniobras.**

En las órdenes del día de la Cámara de Diputados figuran despachos abriendo créditos extraordinarios a diferentes reparticiones del estado, entre ellas al Departamento de Guerra y Marina. Dichas sumas aparecen como invertidas en el racionamiento de las tropas movilizadas y en el mantenimiento de las caballadas y pertrechos durante guerras, maniobras, revoluciones y campañas militares.

Este mecanismo administrativo doloso operó durante la Guerra de la Triple Alianza, y posteriormente en cada evento crítico, como las revoluciones de 1874, 1880 y 1890. Durante la Guerra del Paraguay y la hegemonía del Liberalismo Nacional (Mitrismo) la gran beneficiaria fue la casa Lezica, Lanús, y Cía., y otras menos notorias como Aguirre, Murga y Galván, Norberto Quirno, Drabble hnos., Tomás Drysdale, Tomás Duguid, etc..<sup>8947</sup> A partir de la hegemonía del Autonomismo Nacional (P.A.N.) dicha influencia se desplazó a favor de Gregorio Torres y Cía, el mismo que operaba de anfitrión --en su estancia La Armonía, sita en la vecindad de la ciudad de La Plata-- al ex Presidente Roca durante su gestión como Ministro de Interior de Luis Sáenz Peña (1891).<sup>8948</sup>

Analizando brevemente las partidas que figuran en dichos créditos, y muy especialmente, aquellas que se refieren a las cuentas presentadas por el proveedor del ejército queda evidenciado que las cuentas respectivas son abusivas y arbitrarias.<sup>8949</sup>

#### **A-VII. Conclusiones**

El orden oligárquico-predatorio fue necesario perpetuarlo mediante una fuerte presencia de diversos dispositivos, entre los cuales se destacaron la guardia nacional, las cajas militares de los cuerpos, el régimen del enganche, el mercadeo de grados y honores, y el comanditismo fraudulento en las proveedurías de los ejércitos, todos los cuales arrastraban fuertes cuotas de corrupción que --sumados a la corrupción generada por la participación en las intervenciones federales a las provincias-- terminaron por infectar la república aristocrática y desatar la pérdida de legitimidad política del grupo social dominante. El avance de un capitalismo competitivo es bloqueado y boicoteado por dicho comanditismo fraudulento, temeroso de ver peligrar su poder patrimonialista, beneficiando así a un capitalismo aventurero y predatorio.

En medio de este clima corrompido se alzaba la Oficina de Enganche como el resabio paradigmático del orden patrimonialista y el chivo expiatorio con el cual ocultar el desmadre moral provocado con los certificados de tierras y con el nepotismo militar oligarquizante que habíamos analizado en los capítulos que siguen.

### **Capítulo IV-A-2.- Organización meritocrática e ilustrada en el seno de un modelo patrimonial-burocrático**

## Índice del Capítulo 2

### B.- Organización meritocrática e ilustrada en el seno de un modelo patrimonial-burocrático.

#### B-I.- Pedagogía militar claustral.

##### B-I-a.- El régimen de internado, los mitos fundacionales y la ética corporativa.

#### B-II.- Reclutamiento, promoción y disuasión meritocrática de sus miembros.

#### B-III- Disciplina en el Colegio Militar y rigidez del escalafón castrense

#### B-IV.- Deserciones, accidentes y dramas en las causales de bajas.

##### B-IV-a.- Flagelo de la peste y la fuga.

##### B-IV-b.- Suicidios románticos, inducidos y culposos.

#### B-V.- Conclusiones

## Palabras Claves

Pedagogía Militar-Claustral--escalonamiento del poder--ética corporativa--flagelo de la peste y la fuga--mitos fundacionales--modelo trinitario—orden meritocrático-predatorio--orden institucional--pedagogía claustral--reclutamiento militar—castigo de azotes--régimen de internado--suicidios inducidos--suicidios románticos-

## Keywords

Corporative—meritocratic-predatory order--military teaching-corporative ethics--military recruitment--institutional order--founding myths--closed pedagogy--induced suicide--romantic suicide--Trinitarian model.

### B.- Organización meritocrática e ilustrada en el seno de un modelo patrimonial-burocrático

Los centros de gravedad o centros de potenciación y movimiento, tanto físicos como morales, que procedentes de un viejo orden caudillista y patrimonial (irracional y personal) habrían arrastrado a las demás esferas de poder, alrededor de las cuales se construyó un nuevo orden meritocrático republicano, fueron principalmente las políticas educativas y militares.

Las instituciones educativas militares --que supuestamente debían proveer de oficiales-- se habían originado en un principio en el seno de ejércitos de milicias (Guardias Nacionales), propias de un orden patrimonial, los cuales coexistían conflictivamente con los ejércitos de línea. Estas guardias nacionales, durante la Guerra del Paraguay, contribuyeron a la formación de un ejército nacional y a la constitución de diversos cuerpos de Línea. En medio de una creciente laicización y gratuidad de la educación pública y de un prolongado proceso de burocratización del estado se fundó el Colegio Militar (1869). Este proceso institucional culminó recién treinta (30) años después con la fundación de la Escuela Superior de Guerra (1900), y se reforzó con la promulgación del Código de Justicia Militar (1898) y con la Ley de Servicio Militar Obligatorio (1901).<sup>8950</sup>

Para analizar la factibilidad de dichos centros de gravedad y las esferas de poder que lograron arrastrar analizaremos los castigos y las penas, y las instituciones educativas, sus cuerpos docentes, sus programas de becas, y sus planes de estudios explícitos u ocultos, como dispositivos de narcisismo grupal, discriminación social, encubrimiento corporativo y represión ideológica, disciplinaria y sexual. Estos dispositivos pueden haber engendrado determinado tipo de vocaciones, identidades y conductas, tanto materiales como ideológicas, morales y simbólicas, en sus cuerpos de jefes y oficiales; como también doctrinas punitivas y disciplinarias, y regímenes de calificación y reclutamiento.

La movilización y desmovilización de los ejércitos también marcaron la suerte de estos estados en proceso de formación.<sup>8951</sup> El ejército de línea –que en un principio coexistió y compitió por la tropa con los ejércitos de milicias (Guardias Nacionales)-- varió en sus dimensiones, según Ramírez (1987), en forma no proporcional a la población, de unos seis mil hombres en 1865 a unos nueve mil veinte años después (1885), y a unos doce mil otros diez años más tarde (1896), sobre-dimensión que llevó a una tasa de un oficial cada siete soldados, en una población de cuatro millones de habitantes.<sup>8952</sup>

Con la desmovilización de los ejércitos en las inmediatas posguerras, la suma de cuadros de oficiales carentes de destino o mando de tropa se incrementaba notoriamente. A semejanza de la posguerra de la Revolución de Independencia (1820-24) y de la Guerra con el Imperio del Brasil (1826-27), comentadas por Oszlak (2004) y por Ocampo (2003), la conclusión de la Guerra del Paraguay indujo a “...guerreros desocupados a enrolarse en uno u otro bando de la facciosa lucha política (1874, 1880), y menguó o recortó también “...la significación del mérito militar”, obscureciéndose así su fuerza y prestigio moral y su presencia institucional y corporativa dentro de la clase dirigente de ese entonces.<sup>8953</sup>

Analizaremos también el rol que tuvo la educación propiamente militar y sus respectivos internados (Liceos y Colegio), con el propósito de aclarar la disputa intelectual sobre la formación y crecimiento del estado-nación; sus bases consensuales de dominación, secularizadas y despatrimonializadas; el contenido de su doctrina militar, y la exigencia de que impere un orden institucional racional, impersonal, meritocrático e ilustrado, como condición inexcusable para que sus actores castrenses puedan asegurar y hacer factible el denominado orden y progreso.

Entre la casi docena de instituciones militares que lubricaron el nuevo régimen de dominación (estado-nación) y que tuvieron su origen en el período de la denominada Organización Nacional (1862-80), se destacan cuatro (4) institutos educativos: el Colegio Militar (1870), la Escuela Naval (1872), la Escuela de Cabos y Sargentos (1881), y la Escuela de Ingenieros Militares (1886); así como media docena de organismos administrativos y profesionales: la Comandancia General de Armas (1862), la Oficina Topográfica Militar (1884), el Estado Mayor General Permanente (1884), la Junta Superior de Guerra, la Escuela de Tiro (1887), Sanidad Militar (1888), el Consejo Supremo de Guerra y Marina (1895) y la Intendencia General de Guerra (1895).<sup>8954</sup>

El Colegio Militar fue fundado como una organización educativa jerárquica, de poder y de status, dotada con reglas, roles y metas organizativas, y en medio de un complejo dinámico de transacciones en constante negociación y renegociación asimétrica entre

tipos diferenciados de actores: docentes, estudiantes, profesionales (médicos, enfermeros) y personal de servicio (cocineros) y de maestranza (sirvientes, peones) y vigilancia (porteros).<sup>8955</sup> También interactuaban funcionarios del poder burocrático externo, tales como la Comisión Directiva del Parque 3 de Febrero, que a partir de 1888 presionaba por limitar la expansión del Colegio y también desalojar el predio; y el Comandante General de Armas, el Ministro de Guerra y los Jueces Federales, quienes incidían en la selección de los integrantes de las Comisiones que dictaminaban sobre quienes serían becados para ser aspirantes a cadetes.<sup>8956</sup> Y en el plano del poder burocrático interno del Colegio, se trabaron negociaciones con funcionarios que repartían premios y castigos tales como los integrantes de la Comisión Superior Inspector, y de la Comisión Examinadora, y posteriormente el Consejo de Disciplina y la Junta de Administración.

Este segundo capítulo se divide a su vez en cuatro apartados, que tratan primero la pedagogía militar-claustral; se sigue con un estudio del reclutamiento y promoción de los aspirantes a cadetes; para luego abordar el flagelo de las deserciones, los accidentes y los dramas en las causales de bajas; y culminar con el análisis de los casos dramáticos de suicidio romántico, inducido o culposos.

### **B-I.- Pedagogía Militar Claustal.**

En un principio, luego de Pavón (1862), y a diferencia de los Colegios Nacionales, se había llegado a la convicción que para formar nuevos oficiales de mar y de tierra se los debía becar en escuelas extranjeras (Saint Cyr, Francia), para lo cual se tenía que llamar a concurso. Como los resultados de dichos concursos no fueron los deseados, se resolvió formar los cadetes en nuestro propio país. Aprovechando el Presidente Mitre la Escuela de Artes, Oficios y Agronomía se inauguraron estudios militares en enero de 1865, bajo la dirección del ingeniero español Jacinto Febrés de Rovira y la inspección local del Teniente Coronel Mariano Moreno, que funcionaron en la antigua quinta del dictador Rosas con sede en Palermo (Buenos Aires), hasta su rápida desaparición en 1868.<sup>8957</sup>

Al año siguiente, en 1869, Sarmiento decide fundar el Colegio Militar con sede en el mismo edificio, lugar donde funcionó más de veinte años, hasta 1893.<sup>8958</sup> Dicha fundación fue practicada a imagen y semejanza de la Academia Militar de Agulhas Negras (Río de Janeiro), de la Academia Militar Chilena (1842) y de West Point (1802), y fue también un corolario necesario de la fundación de los colegios nacionales a comienzos de la Organización Nacional, en tiempos de Mitre (1862-68).<sup>8959</sup> La creciente influencia del evolucionismo y la fe en el poder de la ciencia a escala universal había incidido notoriamente en la gestación de la política educativa, y de dicha esperanza no podía estar ausente la formación profesional de los cuadros militares.<sup>8960</sup>

Los cambios en el primer nivel, el de la ideología, necesariamente debían entonces precipitar cambios en el segundo nivel, el de las instituciones.<sup>8961</sup> Es así como esta fundación provocó luego infinidad de controversias sobre su grado de autonomía respecto del aparato y jerarquía militares, y sobre las secuelas formativas, competitivas y conflictivas que sus generaciones de egresados desataron en la vida interna del ejército, en especial en la disputa entre la antigüedad y el mérito como criterios dominantes para ser tenidos en cuenta en los ascensos, muy similar al impacto que en la gestación del generalato tuvieron más tarde los graduados en la Escuela Superior de

Guerra.<sup>8962</sup> A la existencia del Colegio Militar debía sumarse la Ley de Ascensos (1882), según la cual los cargos de mando debían ser concursados y no otorgados por antigüedad.<sup>8963</sup>

En ese sentido, en materia legislativa, a diferencia de la sociedad civil donde el andamiaje institucional del Antiguo Régimen fue reemplazado por una codificación napoleónica, en el ámbito militar perduró hasta fines de siglo la arquitectura jurídico-institucional y burocrático-patrimonial colonial representada por las Ordenanzas de Carlos III. Desplazado el Cuerpo de Línea como fuente originaria de la educación castrense, el Colegio Militar devino en la única institución responsable de la formación de sus cuadros de oficiales.<sup>8964</sup>

### **B-I-a.- El régimen de internado, los mitos fundacionales y la ética corporativa**

El régimen claustral, de encierro o internado, propio tanto de la pedagogía castrense como de la clerical, despojaba al adolescente de la privacidad e intimidad familiar para someterlo a una suerte de adolescencia pública y a una serie de pautas subculturales específicas (exclusión de lo femenino, penalización de lo homosexual, escisión de vida civil y vida militar o clerical, etc.).<sup>8965</sup> La currícula militar explícita, e implícita u oculta, estaba influenciada por patrones ideológicos racistas, sexistas y belicistas o guerreristas, heredados de la legislación y de las sociedades patriarcales y estamentales habsburgas y burocrático-patrimoniales borbónicas, correspondientes al antiguo régimen colonial español, e impregnada de un providencialismo mesiánico secularizado y de la filosofía socio-darwinista prevaleciente en ese entonces (que subestimaba la naturaleza nómada de los “pueblos sin historia”). También estaba influenciada por mitos fundacionales alimentados de esencialismo religioso, tales como la identidad de la milicia con el origen de la “patria” o la construcción del estado-nación, y el culto apologético a un exclusivo panteón de héroes, los cuales incidían severamente sobre la conformación de los rituales militares y de los planes y programas de estudio, así como en la formación de una “mentalidad de status”.<sup>8966</sup>

La currícula también estaba influenciada por una ética corporativa embebida de prototipos escalafonarios; pautas de virilidad o masculinidad; estereotipos de honor, de hombría y de camaradería; códigos de obediencia y antigüedad; normas jerárquicas de vasallaje intra-militar, ceremoniales de investidura y rituales de marcialidad, de pleitesía (saludo) y de salvoconductos nupciales y mortuorios; así como del principio rector de subordinación del poder militar al poder político; todos los cuales influían decididamente sobre las reglamentaciones; los patrones de escolaridad y calificaciones (orden de méritos); las pautas de socialización y legitimación; y las reglas de reclutamiento, elección de arma y de baja o retiro en vigor.<sup>8967</sup> Tan rigurosos se volvieron los códigos ceremoniales que empezaron a multiplicarse los incidentes por faltas contra la etiqueta.<sup>8968</sup>

Pero lo más común era la incorporación institucionalizada de los graduados en el mundo académico militar extranjero; que fue habsburgo en la era colonial de la dinastía de los Austria, francés en las etapas Borbónica y nacional, y prusiano en la fase finisecular.<sup>8969</sup> Esta institucionalización dependiente, más conocida como cipayismo intelectual, los conducía a que lo prioritario era pensar, estudiar y ensalzar lo que deseaban escuchar los mandos de turno. Estos militares intelectuales (Vedia, Capdevila, Godoy, Riccheri, Rostagno) llegaban a sofisticarse y consagrarse como los detentadores de la “verdad” y,

eran considerados como los grandes gurúes de la *intelligentzia* militar, lo cual no fue óbice para que luego de la Revolución del 90 se enfrentaran mutuamente, con motivo de la Ley del Servicio Militar Obligatorio (1901) y de la creación de la Escuela Superior de Guerra.<sup>8970</sup>

En principio, los planes de estudio se compaginaron con los de los Colegios Nacionales.<sup>8971</sup> Las únicas materias de dichos Colegios no dictadas en el Colegio Militar “...eran las de Latín, Retórica y Filosofía, cuyo tiempo era cubierto por los estudios específicamente militares”.<sup>8972</sup> Entre las materias militares se destacaban las de artillería y fortificaciones.<sup>8973</sup> Excepcionalmente, dentro de estos planes y programas se incorporaban lecturas obligatorias referidas a la legislación vigente y especies de conferencias, justas o torneos intelectuales, donde los cadetes ejercitaban su capacidad oratoria. Justamente, por estar en juego en estos torneos las libertades de conciencia y de pensamiento, se produjeron desavenencias y conflictos que terminaron lamentablemente por anularlas.<sup>8974</sup> No obstante el intenso énfasis otorgado al rol de la ciencia y la tecnología en la guerra, la discusión más frecuente era la referida al necesario balance entre la formación teórica y la educación práctica, venciendo aparentemente esta última en desmedro de la primera recién a fines de la década del 90.<sup>8975</sup> Por último, la modificación del Reglamento del Colegio y la consiguiente creación del Consejo de Disciplina y de la Junta de Administración merecieron una intensa preocupación.<sup>8976</sup> La reglamentación de los exámenes se refería a los mecanismos de clasificación, pedestal del orden meritocrático.<sup>8977</sup>

## **B-II.- Reclutamiento, promoción y disuasión meritocrática de sus miembros.**

Las diferencias conceptuales y orgánicas en la administración del Colegio se manifestaban en las designaciones docentes. Estas designaciones dieron lugar a conflictos internos entre la dirección del Colegio por un lado y la Presidencia de la Comisión Superior Inspectora (CSI) del propio Colegio por otro, que evidenciaba las hondas diferencias conceptuales y orgánicas que distanciaron entre sí a los Directores Vedia y Santa Cruz.<sup>8978</sup> Vedia defendía y reclamaba un necesario grado de autonomía de las instancias superiores del arma y una cierta discrecionalidad y monopolio en la designación de los docentes, en perjuicio de los que detentaban las cátedras.<sup>8979</sup>

También incidían en la conducción oficial del Colegio organismos informales, tales como las logias militares, que por cierto eran secretas.<sup>8980</sup> Según Cárcano (1944), los oficiales egresados del Colegio Militar formaban una asociación “...de ostensible propósito cultural y ayuda mutua, presididos por el Coronel Ramón Falcón [1-5-A]”.<sup>8981</sup> A sus “reuniones secretas”, celebradas en tiempos de Juárez Celman (1886-1890), el único invitado civil era Cárcano, participando de las mismas varios coroneles

pertenecientes a las primeras promociones, entre ellos por Alberto Capdevila (1-10-A), que la presidía de hecho, y por los hermanos Rómulo Parkinson (1-6-A) y Tomás Parkinson (1-11-A), que se graduaron en la primer promoción del Colegio; y por Justo Domínguez (2-11-I), y Narciso Bengolea (2-1-I), que lo fueron de la segunda promoción; y por Rodolfo Kratzenstein (3-3-C), Ramón Jones (7-3-A) y Carlos O'Donnell, de promociones posteriores.<sup>8982</sup>

En cuanto al reclutamiento, era evidente, que para los hijos de inmigrantes el deseo de arraigarse en la sociedad nacional los hacía elegir una profesión tenida por “patriótica”.<sup>8983</sup> Tan debe haber sido así, que para la década del 30, Rouquié observó también una “reacción de la nobleza”, la cual habría impulsado a los hijos de la oligarquía terrateniente hacia el Colegio Militar.<sup>8984</sup> Este reclutamiento y promoción de los oficiales en la carrera militar fue estudiado por Imaz (1964) y por Rouquié (1981). Imaz elaboró para la segunda mitad del siglo XX una tipología del generalato, entre aquellos que provenían de familias tradicionales del interior, y aquellos otros procedentes de familias inmigrantes italianas, españolas y alemanas. A diferencia de Prusia y Francia, Imaz afirmó que el reclutamiento en los institutos militares argentinos era abierto.<sup>8985</sup> Más afinadamente, Rouquié fundó su estudio sobre la base de una muestra de generales que habían ingresado al arma entre 1875 y 1885, a quienes discriminó por clase social y origen geográfico local e internacional, y de la cual concluyó que la extracción social de los oficiales superiores durante los festejos del Centenario (1910) fue moderna, por ser urbana y procedente de las provincias más dinámicas.<sup>8986</sup> No contento con su muestra de los generales, Rouquié (1981) se embarcó en el análisis de los graduados en la promoción 38 del Colegio Militar, correspondiente al año 1913, y al clasificarlos entre quienes contaban con apellidos plebeyos y quienes ostentaban los de la gentry nacional, observó con asombro la abundancia de los primeros, entre los que prevalecían los patronímicos italianos.<sup>8987</sup> Sin embargo, para este análisis Rouquié (1981) debe haber encontrado arduo identificar entre aquellos graduados que portan apellidos hispanos, quiénes eran hijos de inmigrantes españoles y quiénes hijos de viejas familias criollas. Repasando ese mismo listado en la obra de Figueroa (1996), encuentro sólo una docena de graduados con apellido italiano y una quincena con apellidos alemanes, franceses e ingleses, sobre un total de 121 graduados, es decir un 10% y un 12% respectivamente, nada sorprendente si tenemos en cuenta la enorme inmigración europea de las décadas previas, que alcanzaba a una cuarta parte de la población total del país en 1895, y a una tercera parte en 1914.<sup>8988</sup> Por el contrario, sí sorprende, como 17 años después, en 1930, en la promoción 56, estos porcentajes se multiplican. En efecto, en dicha obra de Figueroa (1996), encuentro sobre un total de 116 graduados, 30 cadetes con apellidos italianos, o un 25%, 15 puntos porcentuales mas que los producidos en 1913.

En sus orígenes, según el capítulo 4º del Reglamento y Plan de Estudios aprobado en 1870 el ingreso al Colegio Militar estuvo restringido en gran parte a huérfanos e hijos de militares. Pero en 1875, durante la presidencia de Sarmiento, fecha en la cual comienza la muestra levantada por Rouquié (1981), el Ministro de Guerra Adolfo Alsina se propuso reformar dicho Reglamento, imponiendo una impronta más meritocrática, para lo cual le manifestó al Director del Colegio Coronel Mariano Moreno que “...lo que la ley se propuso, no fue dar educación a los hijos de tales o cuales, sino fundar una casa de educación que diera a la República oficiales instruidos, siendo preferidos, en igualdad de condiciones, los huérfanos de militares”.<sup>8989</sup> Es así que hasta 1902, los futuros oficiales ingresaban al Colegio Militar como aspirantes a

cadetes, y luego ascendían a los grados intermedios de abanderados o portaestandartes, o de cabos, sargentos y alféreces, para recién entonces iniciar su carrera de oficiales.<sup>8990</sup> En los comienzos del Colegio, los cadetes llegaron a ingresar a los doce años, apenas aprobado el ciclo primario; para más luego fijarse por ley a los catorce años de edad.<sup>8991</sup>

La vocación y el reclutamiento de los cadetes variaba según su diferente edad e identidad étnica (mestiza, criolla, mulata, europea) y geográfica (regional y provincial); y su dispar conciencia estamental, de clase, de raza y de prosapia familiar (veterana de las guerras de Independencia, del Brasil, de las luchas civiles, del Paraguay y del Desierto).<sup>8992</sup> La demanda por incorporarse a las filas del Colegio Militar provenía de las instituciones provinciales, y de la sociedad civil, diferenciados ya sea como: a) pensionistas, dotados de una incipiente conciencia de clase (aquellos que por contar con padres pudientes abonaban un arancel); b) becarios (hijos de militares); y c) aspirantes procedentes de los propios cuerpos de línea, que subsidiaban la incorporación de sus jóvenes oficiales a dicho Colegio en calidad de alumnos agregados o externos, dotados de una fuerte conciencia estamental.<sup>8993</sup> La manipulación de estos mecanismos les permitió a las autoridades ejercer un rol de filtro meritocrático frente a la creciente demanda por incorporarse a sus filas.<sup>8994</sup> En esa tendencia meritocrática, con el tiempo, la condición de alumno agregado o externo comenzó a ser puesta en tela de juicio.<sup>8995</sup>

A diferencia de los Colegios Nacionales fundados durante la Presidencia de Mitre (1862-68), que eran numerosos y existían en cada cabecera de provincia; el Colegio Militar de la Nación era único en su género, y por ello mismo se debía garantizar en su seno la representación de las minorías provinciales, mediante un mecanismo clasificatorio proporcional, evaluado en cada capital de provincia, con participación de la Justicia Federal.<sup>8996</sup> Para los que solicitaban becas en las Provincias se recomendaba que "...sería conveniente se nombrara en cada Provincia una Comisión de tres profesores presidida por el Juez Federal para que examinen y manden a este Colegio las clasificaciones puestas en los expedientes que deben iniciar los candidatos para solicitar la beca con sujeción al art.2º, título III del Reglamento".<sup>8997</sup> Pero esta descentralización geográfica en la anotación de las clasificaciones para el ingreso y por consiguiente en la selección de los beneficiarios de becas y vacantes se prestó a abusos, por lo que debió ser posteriormente revisada.<sup>8998</sup>

### **B-III.- Disciplina en el Colegio Militar y rigidez del escalafón castrense.**

Las autoridades de la Compañía de Cadetes gestaban, mediante una estructura jerárquica de premios y castigos, un escalonamiento del poder interno entre los aspirantes, en lo que se denominaban las clases (sargentos, cabos y distinguidos), los bedeles, y los celadores o sub-bedeles, así como entre los galardonados como abanderados o porta-estandartes, quienes poseían una responsabilidad en la custodia del orden durante los cursos, los recreos y los paseos de sus propios camaradas. También se daba una estratificación entre quienes eran becarios, por lo general hijos de militares; quienes eran pensionistas, por lo común hijos de hacendados, comerciantes y/o profesionales; y quienes eran agregados, procedentes de las unidades militares del Ejército de Línea y aún del propio Ministerio de Guerra y Marina.<sup>8999</sup>

Estos escalonamientos y estratificaciones engendraban nuevos conflictos donde becarios y pensionistas cerraban filas contra los agregados, o los agregados y becarios contra los pensionistas.<sup>9000</sup> En los dos primeros años, no estaban divididos por armas, siendo aún muy inocentes e inmaduros, y sin tener definida la orientación sexual, era cuando se encontraban vulnerables al acoso de los más antiguos e inescrupulosos, especialmente de parte de los agregados. La animosidad entre diversos orígenes provinciales, antagónicas tradiciones histórico-familiares, pertenencia a distintas promociones y a diferentes armas a partir del curso de segundo año, y por contarse en ese entonces con saludos y uniformes diversos, se añadían nuevos elementos de conflicto que afectaban la promoción meritocrática.<sup>9001</sup> Las medidas disciplinarias, los arrestos y las prisiones en cuarteles aledaños, como el del Parque de Artillería, los pontones anclados en la rada, o el Estacionario o **Depósito Correccional de Menores**, dependiente de la Capitanía General de Puertos, por parte de aquellos cadetes que cometían faltas gravísimas, alimentaron la estructura de castigos o disuasivos.<sup>9002</sup>

El rango de los jefes y oficiales que fueron egresados del Colegio quedaba determinado por el número ordinal de la promoción a la que pertenecieron, que revela su antigüedad (la cual se convertía en un grado más); por el arma elegida; por la numeración del Orden de Mérito alcanzado en la promoción respectiva; y por cuáles oficiales avalaban sus testimonios, producidos en oportunidad de confeccionar la foja de servicios. La relevancia de dicha numeración depende, a su vez, de la cantidad de cadetes graduados en su promoción específica.

## **B-IV.- Deserciones, accidentes y dramas en las causales de bajas.**

### **B-IV-a.- Flagelo de la Peste y la Fuga.**

La vida de encierro en el Colegio transcurrió en sus primeros tiempos en un clima crecientemente nocivo por las amenazas de epidemias, que se cobró entre los cadetes varias víctimas.<sup>9003</sup> La muerte temprana de un cadete podía obedecer a accidentes mortales tales como ejercicios ecuestres o gimnásticos y maniobras militares, o provocados por el cólera y la peste tifoidea o por conatos de suicidio.

El hacinamiento al que estaban condenados por la estrechez física del edificio sito en Palermo, y las muy pobres condiciones en materia de higiene llegaron a provocar las denuncias del periodismo, que ya estaba muy sensible a las reformas institucionales en materia médico-asistencial.<sup>9004</sup> En la propagación epidémica mucho habría tenido que ver la acumulación de los depósitos de letrinas y sumideros, que por la escasez de carros atmosféricos, las autoridades se habían demorado en sangrarlos. A ello se sumaba la pobreza del vestuario con que contaban los cadetes.<sup>9005</sup> Meses después, en noviembre de 1886, la fiebre se ensañó gravemente con los cadetes.<sup>9006</sup> Con ese motivo estuvieron a punto de ser trasladados al edificio de un colegio del barrio de Caballito, mudanza que se frustró. Más luego, se ensayó mudar el Colegio primero al establecimiento denominado “Santa Catalina”, en la actual Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires), postergándose su desplazamiento hasta fines de 1891, y luego a una chacra ubicada en Vicente López; para finalmente por las instalaciones de una Escuela de Artes y Oficios, ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires, que había sido construida por el gobierno provincial en 1855.<sup>9007</sup> Casi medio siglo después, en 1938, y en virtud de la edificación del Colegio Militar en Palomar, la institución se desdobra física y

pedagógicamente, entre un colegio propiamente dicho; y por otro lado, un colegio preparatorio, denominado Liceo General San Martín, con asiento en el mismo edificio sito en San Martín.<sup>9008</sup>

La alternativa más próxima contra este anacrónico estado de cosas era la fuga individual, la cual se convirtió entonces en un recurso crónico.<sup>9009</sup> La fuga de los cadetes era favorecida por el gamberrismo juvenil y el descubrimiento de la sexualidad y por estar privados del control familiar. La fuga también obedecía a una búsqueda de lo nuevo o desconocido, que estaba incitada justamente por la existencia de barreras y guardias. Claro que no todas las fugas fueron iguales, las hubo que fueron meramente esporádicas, guiadas por un natural afán de juega y de sexo; y otras muy definitivas, más próximas a la figura de la desertión, y otras gravísimas cuando se practicaba estando arrestado.<sup>9010</sup>

#### **B-IV-b.- Suicidios Románticos, Inducidos y Culposos**

En un universo autoreferente, claustal y represivo, como lo es la vida cuartelera, el clima psicológico en momentos de crisis individual era propicio para que se produjeran conatos de suicidio. En ese sentido, en los colegios militares se habrían dado diversos tipos de suicidio, entre ellos el suicidio romántico, el suicidio inducido y el suicidio culposo.

El primero, el suicidio romántico, era propio de una hipertrofia de la camaradería o de una homofilia engendrada durante la pubertad y la adolescencia, en internados donde sus miembros estaban forzosamente separados de su núcleo familiar de origen.<sup>9011</sup> La camaradería o lealtad y solidaridad grupales se fragmentaba por fuerza y por arma, y dentro de cada una de las mismas, se diferenciaba por la promoción de pertenencia. En cuanto al suicidio inducido, lo habría sido como secuela de tormentos,<sup>9012</sup> o a instancias de la propia institución de pertenencia, cuyo “honor” o reputación habría quedado comprometida por la naturaleza “deshonrosa” de los actos homoeróticos descubiertos.<sup>9013</sup> La secuela más trágica acontecida en el Colegio Militar fue el probable suicidio de los estigmatizados como hipotéticamente sodomizados.<sup>9014</sup> Y en materia de suicidios culposos, probablemente como consecuencia de la presión provocada por la insubordinación y consiguiente prisión de una veintena de cadetes, que ocurrió a fines de 1883, y que fueron posteriormente sobreseídos, el Jefe de la Compañía Capitán Juan Francisco Cristóbal sintiéndose culpable se suicidó en febrero de 1884.<sup>9015</sup>

Para calibrar la verdadera dimensión de estos dramas es preciso tener en cuenta que los padres, algunos de ellos militares y otros hacendados o profesionales, enviaban a sus hijos al Colegio Militar para que se “hicieran hombres”, y en algunos casos se los devolvían paradójicamente “invertidos”.<sup>9016</sup> Cuando esto último se descubría se desataba el denominado “pánico homosexual”, pues el “honor” del apellido quedaba mancillado, no quedándole a los imputados otra alternativa que el suicidio, que no podía ser otra cosa que un suicidio inducido, pues ni a su propio hogar podían retornar.<sup>9017</sup> Las causas principales del suicidio juvenil homoerótico detectadas son los celos y “...la soledad, la depresión, el miedo al rechazo, la falta de apoyo familiar, la baja autoestima, y la denigración y sátira constante de su género de vida”.<sup>9018</sup> Finalmente, los dos escándalos más notorios, tanto el de la década del 80 en el siglo XIX, como el de la década del 30 en el siglo XX, habrían sido uno de los factores que influyeron en el

conflicto insurreccional y revolucionario de 1890 así como del golpe de estado de 1943.<sup>9019</sup>

Distante el recuerdo de la Guerra del Paraguay, las revoluciones en ese entonces eran una suerte de bautismo de fuego donde se ponía en evidencia la hombría, la camaradería y la masculinidad o virilidad. En la larga década del 80, esa virilidad se había menguado y hasta adormecido, la cultura se estaba feminizando, y la vida de internados había vuelto a las nuevas promociones más cerradas, represivas y endogámicas. Por eso es fundamental estudiar el rol de la educación militar (Liceos y Colegio) y de los internados como espacio de represión disciplinaria y sexual, para comprender también otras motivaciones no puramente políticas que pudieran haber coadyuvado a los fenómenos sediciosos y revolucionarios.

## **B-V.- Conclusiones.**

Indudablemente el Colegio Militar de la Nación se erigió en un comienzo como el paradigma de un orden meritocrático emergente, que supuestamente se iba a difundir al resto de las instituciones armadas, con el ulterior propósito de lograr el monopolio nacional de la violencia legítima. Pero una vez fundado, tuvo inicio una corriente de celos y envidias emanada de aquellos oficiales que vieron sus perspectivas de ascenso bloqueadas. Asimismo, la existencia del Colegio Militar significó una vinculación informal con los Colegios Nacionales, de los cuales procedía gran parte de su cuerpo docente, así como con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde recalaban muchos cadetes y jóvenes oficiales con aspiraciones de devenir ingenieros militares. Por el contrario, la negligencia en materia sanitaria reveló la mortal ausencia de los organismos públicos responsables de controlar la salud de la población.

## **Capítulo IV-A-3- Orden predatorio territorial como dominación pretoriana dependiente.**

### **Índice del Capítulo IV-A-3**

C.- Orden predatorio poblacional-territorial como dominación pretoriana dependiente.

C-I.- Poblamiento predatorio en los “pueblos sin historia” o poblaciones originarias.

C-I-a.- Tribus de originarios del Chaco.

C-I-b.- Tolderías, matanzas y fugas al monte.

C-I-c.- Guerra de matorral o escaramuzas y masacres de originarios.

C-I-d.- Supercherías en las bajas contra el indio;

C-II.- Confinamiento desnomadizador de poblaciones cautivas como dispositivo pretoriano de acumulación originaria.

C-III.- Capitalismo predatorio o colaboracionismo pro-indígena y anti-militar.

C-III-a.- Reciprocidades de colonos y dueños de obrajes.

C-III-b.- Comercio ilegal de armamento.

C-IV.- Conclusiones.

## **Palabras Claves**

Acumulación originaria--colaboracionismo pro-indígena y anti-militar--comercio ilegal de armamento--complicidad de colonos y dueños de obrajes--confinamiento des-etnizador--conquista territorial—desnomadización--disputas de estrategia militar—dominación pretoriana dependiente--orden predatorio en “pueblos sin historia”--guerra de escaramuzas--masacres indígenas--orden predatorio--poblaciones originarias--supercherías en las bajas contra el Indio--Tribus indígenas-

## **Keywords**

Denomadization-- dependent praetorian dominstion--original accumulation--anti-military collaborationism--illegal arms trade--territorial conquest--disputes on military strategy--genocide of peoples without history--indigenous massacres—predatory order

## **C.- Orden Predatorio Poblacional como Dominación Pretoriana dependiente.**

Garantizado un orden burocrático-institucional mínimo, que la creación de un ministerio de guerra y marina y la fundación de institutos educativos civiles y militares --por el moderno estado-nación republicano-- había provisto, se encaró luego la Hobbesiana empresa de resguardar un orden burocrático elemental que garantizara la reproducción social, económica y demográfica de dicho estado, típica operación de dominación pretoriana, que se aplicó tanto en el antiguo estado absolutista Habsburgo como en los más recientes estados modernos, el recolonizador Borbónico y el nacional independentista.<sup>9020</sup> Las conquistas del denominado “Desierto” en la Argentina decimonónica así como las intervenciones federales a las provincias, corresponden según Oszlak (1997, 2004) a la “íntima correlación entre orden y progreso”, y habrían obedecido también a la necesidad de constituir el estado-nación así como a una especulación geopolítica de alcances continentales.<sup>9021</sup> Sin embargo, su naturaleza político-militar y sus estrategias alternativas se diferenciaron entre las fronteras norteañas y las sureñas, pues los confines geográficos de la conquista abarcaron casi simultáneamente las regiones sur y norte del espacio nacional. Y las estrategias militares implementadas variaron también dramáticamente entre aquellas meramente defensivas o de contención y aquellas otras fundamentalmente ofensivas.

La presión pretoriana para avanzar sobre el desierto, “civilizar al salvaje”, y redistribuir las nuevas tierras, que la masa inmigratoria colonizadora y el capital internacional ejercieron sobre el estado neo-colonial y sobre estas fronteras, implicó a su vez de parte de las poblaciones originarias o “pueblos sin historia”, diversas estrategias defensivas. A diferencia de la frontera sur (La Pampa, Neuquén), donde la máquina de guerra en operaciones significaba para los indios tener que buscar refugio en los santuarios del sur de Chile; en la frontera norte del Chaco, Salta y Santiago del Estero las expediciones militares provocaban el automático refugio en el monte, donde los indios se volvían montaraces acentuando su nomadismo, y el combate se metamorfoseaba en una escaramuza o guerra de matorral, donde la tradicional carga de caballería se revelaba como un expediente ineficaz y obsoleto.<sup>9022</sup>

En dichas campañas militares, entre los problemas más serios figuraban su financiación, la aclimatación del soldado destinado a los regimientos de frontera, y el rol a jugar por estas últimas unidades en los conflictos políticos del país. Para su financiación, es decir

el pago del prest y del rancho, prevalecía el viejo sistema de los comisarios pagadores, para cuya efectivización era preciso acudir al préstamo usurario de los financistas foráneos. En ese sentido, durante la Confederación Argentina (1852-1862) el Ministro de Hacienda se respaldaba en el financista francés José de Buschental, residente en Montevideo, que era un representante del Barón de Mauá.<sup>9023</sup>

Entre otras dificultades, para emprender las campañas militares se tenía que sortear la ausencia de información cartográfica y de una infraestructura física, es decir de vías de comunicación (picadas) y de fuentes de agua, teniendo que reconocer aguadas y peregrinar largamente en la búsqueda de pozos de agua.<sup>9024</sup> Las primeras expediciones exploradoras comenzaron en 1870, con el Comandante Teniente Coronel Napoleón Uriburu, quien cuatro años después se involucró en la sublevación Mitrista de La Verde. Y la modernidad tecnológica del ferrocarril recién llegó a La Sabana (Chaco), por vez primera, veinte años después, en 1892; y arribó a Resistencia (Chaco) recién en 1907, y con él sus administradores locales y la proliferación de un capitalismo depredador y aventurero, que no era ni racional ni legal, representado por los obrajes madereros y la parafernalia social y comercial consiguientes.<sup>9025</sup> Una vez establecida la dominación militar pretoriana, y con la colaboración de la Marina de Guerra, que contribuyó a remontar los ríos Bermejo y Pilcomayo, se fueron desagregando y trabando transacciones en una negociación cotidiana con nuevas instancias institucionalizadas de poder externo, como los Interventores militares y los corresponsales y reporteros de los periódicos nacionales y locales de circulación masiva; así como del poder interno, tales como la Misión Franciscana, los Obrajes madereros, la Comandancia militar, el vicariato castrense, Sanidad militar, los cacicazgos indígenas, etc., todos los cuales desempeñaron un rol especial en la reproducción social, económica y demográfica.

Este tercer capítulo lo dividiremos a su vez en tres (3) apartados, comenzando con el tratamiento que recibieron los “pueblos sin historia” (o poblaciones originarias) por parte de las expediciones militares; para continuar encarando la naturaleza desnomadizadora del confinamiento sufrido por las poblaciones cautivas, y como este último se convirtió en un dispositivo pretoriano de acumulación originaria. A renglón seguido examinamos las estrategias de supervivencia de colonos y empresarios, entre ellas el capitalismo predatorio o colaboracionismo pro-indígena y anti-militar.

### **C-I.- Poblamiento predatorio en “pueblos sin historia” o poblaciones originarias.**

Los patrones ideológicos predatorios prevalecientes en el ejército nacional fueron heredados de la legislación y de los órdenes estamental y burocrático-patrimonial del antiguo régimen colonial español, y posteriormente fueron enriquecidos por un providencialismo mesiánico secularizado y por la filosofía evolucionista y biologicista dominante en ese entonces.<sup>9026</sup> Este apartado lo subdividiremos a su vez en cuatro ítems: a) tribus indígenas del Chaco, b) tolderías, matanzas y fugas al monte, c) guerra de matorral o escaramuzas y masacres indígenas, y d) supercherías en las bajas contra el indio.

#### **C-I.-a.- Tribus de originarios del Chaco.**

Entre el número tan considerable de tribus o naciones que los antiguos conquistadores o misioneros daban como existentes en los desiertos del Chaco, el Comandante de la

Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu, con la segura colaboración del geógrafo- etnólogo e Ingeniero militar alemán Teniente Coronel Federico Host, no reconocía en su Informe de 1873 sino cuatro etnías, "...que por la diversidad de sus idiomas y en algunos detalles de sus costumbres, difieran unas de otras; como también en el régimen de sujeción y educación, en las reglas y armamentos de guerra, acreditan una diferencia de origen y constitución".<sup>9027</sup>

Diez años más tarde, en 1884, Host participó en la Expedición del General Benjamín Victorica, oportunidad en la que a la vera del río Bermejo descubrió las ruinas de la antigua Reducción de indios tobas San Bernardo de Vértiz (La Cangayé), y trazó el diseño del pueblo Expedición, conjuntamente con el Teniente Félix Cattaneo.<sup>9028</sup> En ese entonces debió conocer a varios de sus compatriotas científicos que participaron en la Campaña del Desierto, o fueron contratados por el sabio alemán Germán Burmeister, entre ellos al geógrafo Arthur von Seelstrung, quien llegó a Argentina en 1863 e incursionó en el Chaco en 1875, al botánico Paul Lorentz, que arribó en 1870, y al zoólogo Adolf Doering, que fue contratado en 1872.<sup>9029</sup> Paralelamente, desde Bolivia, repetidas expediciones de exploradores extranjeros fueron emprendidas bajando por los ríos Bermejo y Pilcomayo, la de Fray José Giannelly en 1863, desde Tarija la del explorador francés Jules Creveaux en 1882, que terminó en un desastre, y desde Caixa la del Dr. Daniel Campos en 1883.<sup>9030</sup> Y también se produjeron intermitentemente incursiones de tropas Bolivianas, que excepcionalmente se cruzaron con las argentinas.<sup>9031</sup>

Para lograr determinar los nombres de las distintas parcialidades de indios que existen en el Chaco, Uriburu o Host persiguieron "...con verdadero ahínco la causa por la cual se dan los nombres que llevan las que yo conozco".<sup>9032</sup> En cuanto a los chiriguanos, para Uriburu o Host "...no conocen en su idioma (el guaraní) una palabra, una frase que pueda ponernos en camino de averiguación. El Mataco que se ofende cuando le llaman así, pues lo atribuye al nombre que por desprecio les dan los conquistadores; no existe, como en el idioma anterior, palabra que justifique este nombre. Los chunupíes o vilelas que aceptan esta denominación, lo hacen por mera complacencia con nosotros".<sup>9033</sup> Tampoco el Toba conoce esta palabra; "...pero ha creído que ella significa una distinción que nosotros le hacemos para que no se le confunda con los matacos a quienes desprecia, porque los considera inferiores en instituciones y en organización e incapaces de resistir el empuje de cierta manera organizada del Toba; circunstancia que este atribuye a cobardía".<sup>9034</sup>

Conociendo algo el idioma de los indígenas y habiendo estudiado sus costumbres en sus propias tolдерías Uriburu o Host se atrevían a afirmar, que "...entre el territorio comprendido desde las caídas de las Cordilleras del Sud de Bolivia, hasta las costas de los ríos Paraguay y Paraná, y en el territorio que presentan los ríos Salados, Bermejo, sus afluentes y Pilcomayo hasta más allá en su banda oriental, no existen otras que los matacos, chunupíes, chiriguanos, y tobas. Estas mismas parcialidades tienen otros nombres, que se subdividen en distintas tolдерías que ocupan vastos territorios, entre los cuales no es mas que el nombre del Cacique con el que se distinguen, pues pertenecen a los ya dichos, de quienes no pueden separarse".<sup>9035</sup>

Respecto de los chiriguanos, Uriburu o Host cuentan que ocupan el territorio comprendido entre "...las altas montañas del Sud de Bolivia estendiéndose al Este hasta Santa Cruz de la Sierra; su número no podría fijarlo, pues aunque me son conocidos los

campos donde viven los indios y sus tolдерías, como las quebradas de Abatiri, Cuancaya y Sugre, en espacio de mas de treinta leguas, cada una de esas quebradas contiene poblaciones tan numerosas, que no sería posible, sin temor de equivocarse, hacer cálculos que pudieran señalar el número de sus pobladores. Muy pocos serán los chiriguanos, los que puedan contarse de los 22° a los 23° Lat. Sud”.<sup>9036</sup>

Los maticos, que limitan con los chiriguanos, pueblan territorios “...desde la caída de las sierras y que ocupan los llanos, tienen sus tolдерías errantes desde las costas del río Pilcomayo, tomando al Sud hasta las inmediaciones de Salta en lo que en esa Provincia se llama frontera, que son tres departamentos. Desde los campos de Agusirenda o la Angostura de Itiyuri hasta ciento veinte leguas río Bermejo debajo de Orán, o el lugar llamado Laguna Verde, y de allí, tomando al Este en esa línea hasta la costa occidental del río Pilcomayo, existen ocupados los campos; y sus mayores poblaciones se encuentran en la costa de los ríos Bermejo, Teuco, Yegua Quemada y Pilcomayo: su número no podría regularlo y únicamente hago conocer lo que yo he encontrado”.<sup>9037</sup>

Por último, para Uriburu o Host los tobas ocupan “...los territorios que desde la costa del río Salado van hasta más allá de la costa Oriental del Pilcomayo y se les encuentra en las costas del Paraná y Paraguay, aunque con otros nombres; pero son los mismos del interior, que limitan por el Norte con los maticos. Su número no podría fijarlo, como el anterior de los maticos, pues se requeriría que se hicieran expediciones durante dos años consecutivos para poder visitar esos lugares y reconocer la inmensa cantidad de indios que existen allí”.<sup>9038</sup>

#### **C-I.-b.- Tolderías, Matanzas y Fugas al Monte.**

Las expediciones militares en el Chaco, al ahuyentar a las comunidades originarias de su habitat, donde estaban sus tolдерías, las empujaban al monte para poder guarecerse.<sup>9039</sup> Según diversos testimonios, las expediciones que se practicaron en 1887, alcanzaron numerosas tolдерías, entre ellas las de “...los famosos Caciques Pitagaray, Teinosé, Natochi, Tanguiyé, Shutoqui, que habían abandonado hacia un mes a lo sumo”.<sup>9040</sup> No obstante los pocos y malos elementos de movilidad con que contaba el Mayor Juan Méndez, continuó en 1887 su marcha “...para alternar rastros que me indicasen la dirección que habían tomado, pero nuevas tolдерías se presentan a su paso de media en media legua, pertenecientes a los Caciques Tenganan, Naquerachi, Temoqui, Lanoqui, Quaiqui, Silana, Pananque y Lanas las que habían también sido abandonados, por los indios que se hallaban en la misma época”.<sup>9041</sup> Unidos con los anteriores, puede calcularse sin exageración alguna “...alcanzarían al número de 2000 o 3000 entre indios de lanza y chusma, los mismos que según declaración del baqueano que llevaba se habían unido para atacar los Fuertes de Napalpí y Aguará y la que no se había llevado a cabo, por las diversidad de opiniones que tuvieron entre ellos”.<sup>9042</sup>

Es importante señalar que según Paz (2003) las etnias chaqueñas, “...poseían una gran movilidad que les brindaba la posibilidad de contar con vastos espacios, los que eran aprovechados para conseguir lo necesario a los efectos de permitir la reproducción social y simbólica mediante las prácticas de caza, pesca y recolección, a lo que debemos de sumar incipientes prácticas de agricultura”.<sup>9043</sup> Dicha movilidad era fundamentalmente ribereña, pues a semejanza de los indios Yurok, del norte de

California, los indios del Chaco, poseían la idea de un universo con estructura tubular, centrada alrededor de los ríos, donde la orientación era río abajo o río arriba, y la banda norte o la banda sur.<sup>9044</sup> Los espacios, producto de la expansión del frente colonial del noroeste argentino (Tucumán, Salta y Santiago del Estero) como también del que se venía realizando desde el Paraguay y desde las costas del Paraná, "...fueron sufriendo un acotamiento que para mediados del siglo XVIII ya no permitía que las diferentes naciones tuvieran un control del "espacio vital necesario"; entrando en sucesivas ocasiones en conflictos bélicos [así] entre ellos cómo también con los colonizadores".<sup>9045</sup> Esto prueba que la resistencia y la lucha de los pueblos originarios del Chaco no fue suficiente para contener el irresistible avance de la colonización civil y militar.

### **C-I.-c.- Guerra de Matorral o Escaramuzas y Masacres de Originarios.**

Señala Bayer con acierto el léxico perverso que usa Walther (1970) contra los habitantes de la región que luego se denominaría "Argentina", pues calificar la matanza de aborígenes como "sangrienta puja de la civilización contra la barbarie", es cuando menos una muestra de hipocresía. Pero sostener que después de Pavón "aún subsistían ignominiosas fronteras internas", es revelar una catadura racista intolerable a estas alturas de la civilización. Este mismo lenguaje y bagaje valorativo, adquirido en su transcurso por el Colegio Militar, aunque mucho más morigerado, ha sido también esgrimido más luego por Scunio (1972) y por Punzi (1997) en sus respectivos trabajos sobre la conquista del Chaco.

Las primeras batidas en el Chaco, más precisamente, en el Río Pilcomayo, al este y sudeste, las llevó a cabo en 1870 y 1873 el Teniente Coronel Napoleón Uriburu.<sup>9046</sup> En 1878 Manuel Obligado realizó una expedición al interior del Chaco con el objeto de hacer una batida general y escarmentar a los indios, librando algunos combates, entre otros, el más importante, ocurrido el 20 de octubre de aquel año.<sup>9047</sup> El 13 de febrero de 1879 Obligado sorprendió con el 10 de Caballería una toldería que estaba al Norte de su línea, en la frontera de San Fernando, matando una veintena (20) de indios de pelea, y cautivándoles 29 indios de chusma. Luego le siguieron las Expediciones de Fontana (1880), Solá (1882), Bosch (1883), Ibazeta (1883) y nuevamente Obligado (1883).<sup>9048</sup> Este último dejó muertos en el campo 90 indios de pelea.<sup>9049</sup>

En cuanto a lo referente a las expediciones practicadas en 1883 al Pilcomayo: el Mayor Zenón Ferreira declara --en la exposición del Teniente 2º Guillermo Oyarzú-- que él fue oficial de la vanguardia a órdenes del entonces Teniente Don Fermín Carranza, estando presente en un combate que tuvo dicha vanguardia el día 2 de agosto de aquel año 1883 que consiguieron dispersar a los indios.<sup>9050</sup>

En los combates del Río Salado (24 de noviembre y 5 y 6 de diciembre de 1884) contra las tribus indígenas del famoso cacique Cambá, el Mayor Rosendo Fraga con los Tenientes Laborda y Fermín Espinosa y un pequeño Destacamento del 7 de Infantería, todos a las órdenes del Ministro de Guerra Benjamín Victorica, fueron aislados por el grueso de los indios.<sup>9051</sup> Cambá resultó muerto en la pelea, el triunfo del ejército fue completo y decisivo para la campaña y la actuación de Fraga.<sup>9052</sup> Las Comisiones del Regimiento 12 de Caballería, a ordenes del Sargento Mayor Don José María Arias, del

Capitán D. Eulogio Ramallo y del Teniente D. Manuel J. Córdoba, batieron en 1886 “...cinco tolderías e hicieron 25 bajas y 19 prisioneros, “...se han conducido sin desmentir el valor, pericia y antecedentes que ha sabido conquistar el Regimiento 12 en las filas del Ejército de la Nación”.<sup>9053</sup>

En San Antonio de Obligado, en marzo de 1887, y a consecuencia del secuestro de un niño indígena, la población originaria se sublevó aprovechando el licenciamiento de las tropas.<sup>9054</sup> Pero más luego fue cruelmente reprimida por destacamentos pertenecientes a la Cuarta División de Ejército, que estaba al mando del general Antonio Dónovan.<sup>9055</sup>

Dentro de esa represión debe considerarse, primero el ataque del Capitán Jorge Señorans “...a los indios del cacique Sixtorí, cuando les inflige el 4 de noviembre de 1887, muertos, heridos y prisioneros, y les toma armas y municiones; y el del 25 Diciembre de 1887 cuando al cacique Mazamí, le toma prisioneros, armas y le produce algunas bajas”.<sup>9056</sup>

El Coronel Celestino Pérez, el que luego fundara el pueblo neuquino de San Martín de los Andes, nos revela como “...el Capitán del Batallón 9º de Infantería de Línea Alejandro Sarmiento obtiene en 1887 un nuevo triunfo batiendo un numeroso grupo de indios que lo esperaban atrincherados causándoles seis muertos, muchos heridos, haciéndoles diez prisioneros y dispersándolos por completo”.<sup>9057</sup>

Las características de los combates en la denominada guerra del matorral consistía en batidas, malones y huidas de las tolderías por parte de los indios.<sup>9058</sup> Según lo que delata la Foja de Servicios del Cap. Alejandro Sarmiento, los indios Tobas que aún se encontraban al Sud de la línea de frontera en pequeñas agrupaciones “...son batidos en todas direcciones por las fuerzas que guarnecen la línea del Bermejo, ellos tenaces en no abandonar sus paraderos buscan refugio en la espesura de los bosques, pero allí son también buscados, batidos y perseguidos por los veteranos en la **guerra del matorral** que actúa en la línea de la referencia”.<sup>9059</sup> A juzgar por dicho documento, el Capitán Alejandro Sarmiento, del Batallón 9 de Infantería de Línea, con una comisión del mismo Batallón, el 30-XI-1887 “...cayó por sorpresa sobre un grupo de indios internados en un monte espeso situado veinte leguas al N.O. de Nalin Lay”.<sup>9060</sup> En el primer momento de sorpresa, los indios “...dejaron en nuestro poder doce prisioneros, pero luego reaccionando en la retirada y favorecidos del monte espeso donde tienen ventajas indiscutibles sobre nuestros soldados y que ellos conocen perfectamente, volvieron caros y resueltos y decididos a la pelea, defendían heroicamente sus familias que a sus espaldas y en desordenada carrera corrían a través del bosque”.<sup>9061</sup> Debido a lo recio de la lucha, ésta duró solo cinco minutos, “...en que por momentos se hacía individual y al arma blanca, abandonando al fin el campo en desordenada y precipitada fuga, después de dejar en el sitio nueve muertos, y llevarse un buen número de heridos. Por nuestra parte tenemos que lamentar la pérdida del soldado del referido Batallón José Cabrera saliendo herido de flecha punta de hierro en el costado derecho el de igual clase Máximo Orozco”.<sup>9062</sup>

A pesar de las contrariedades, en noviembre de 1887 el Teniente Juan Méndez tomó allí un indio baqueano y se dirigió a pasar el Río Tragadero (Chaco), que cruzó a nado con toda felicidad.<sup>9063</sup> Estos campos “...a causa de las lluvias se pusieron intransitables, pero la seguridad que tenía de la proximidad de las Tolderías decidieronme a continuar la marcha que duró cuatro días consecutivos, siempre por el agua y muchas veces cayéndose las cabalgaduras en los guadales, otras marchando los soldados a pie, con la

mula de la brida, llegué por fin en la madrugada del día 9-XI-87, a pernoctar en las mismas tolderías de los famosos Caciques Pitagaray, Teinosé, Natochi, Tanguiyé, Shutoqui que habían abandonado hacia un mes a lo sumo”.<sup>9064</sup>

El Coronel Jorge Señorans tomó parte en la expedición que al mando del Mayor Alejandro Sarmiento “...salió en enero de 1889 a batir al cacique Petizo, regresando a Resistencia el 16 de febrero”.<sup>9065</sup> Y el Teniente Carlos Campos Gutiérrez el día 14 de mayo de 1888, sorprendió una pequeña partida de indios “...del cacique Narreaichí tomando cinco prisioneros de chusma y siguiendo la persecución escarmentó a los parciales de los caciques Margachi, Donachi, y otros tomando doce prisioneros mas de chusma”.<sup>9066</sup> El 28 de junio del mismo año el Tte Campos Gutiérrez, acompañado de un oficial, y trece soldados de tropa, se encontró “...con una posición atrincherada de foso y palo a pique, guarnecida por 480 indios mandados por diez caciques todos a las ordenes del Cacique Carancho, asaltada por dos veces la posición fue tomada por la tropa después de una lucha de cerca de media hora, dispersándose los indios por el monte y dejando en su huida diez y ocho prisioneros y setenta muertos”.<sup>9067</sup> El 16 de octubre del mismo año Campos Gutiérrez atacó “...por sorpresa una pequeña toldería de indios en la banda occidental del río Teuco, haciéndoles diez bajas, bastantes heridos y tomando algunos prisioneros, teniendo por su parte un cabo muerto a bala”.<sup>9068</sup> Esta última operación indicaría a juzgar por el testimonio de Campos Gutiérrez un promedio de diez bajas indígenas por cada baja militar.<sup>9069</sup>

Más tarde, en 1891, el general Antonio Dónovan fue nombrado gobernador del Chaco y comandante en jefe de una división de caballería y estableció las líneas de fortines conocidas: de Salta a Rivadavia, de Resistencia a Nepalí, de Puerto Bermejo a Presidencia Roca, de Formosa al Pilcomayo, y esas “...fueron guarnecidas por tropas de caballería y hasta de Infantería, pues contribuyeron a garantizar las vidas e intereses de los pobladores del norte santafecino, los batallones 1, 3, 7, 8, y 9 de dicha arma”.<sup>9070</sup> El general Dónovan logró una efímera tregua solicitando y obteniendo del gobierno nacional que “...a las tribus reducidas se les concediera racionamiento, vestuario, útiles de labranza, etc. Esto atrajo algunos millares de indios. Pero cuando no se les pudo sostener mas y se les entregó a sus propias fuerzas, retirando al mismo tiempo las tropas, esas indias volvieron al monte y entonces llevaban sus malones con más acierto y reiteración”.<sup>9071</sup> Cabe aclarar, que las tropas fueron retiradas de los fortines, por cuanto debido al levantamiento de un piquete de guardiacárceles en Corrientes, en 1891, el general Dónovan se vio precisado a cruzar el río Paraná en defensa de las instituciones correntinas.<sup>9072</sup> El mismo procedimiento fue repetido dos años después, en 1893, cuando el Comandante de la guarnición del Chaco Central (Formosa), General Napoleón Uriburu debió cruzar el Paraná para defender las autoridades Autonomistas de Corrientes.<sup>9073</sup>

Finalmente, durante la larga gestión del General Enrique Luzuriaga (1894-1906), en marzo de 1899, un millar de tobas al mando del Cacique Matolí, atacó en Salta el pueblo de Santo Domingo.<sup>9074</sup> Diez años después, en marzo de 1909, según informes y deducciones que el Coronel Teófilo R. O'Donnell hizo sobre el mismo teatro de los sangrientos sucesos ocurridos en el puesto Bros y Warnes, sobre el río Bermejo, guarnecidos por los Sargentos Juan Agramante, Rómulo A. Cisneros, Cabo Andelito Paz y soldados voluntarios Lorenzo Rosales y Cándido Cazón, “...los indios se presentaron a los puestos mencionados sin armas, en carácter amistoso, buscando alimentos y ropas usadas como lo hacían frecuentemente; recibidos con una confianza

quizás asaz imprudente y sin ninguna precaución por los soldados de estos puestos los indios con toda felonía los acometieron al parecer a traición, ultimándolos a golpes de palo y con las hachas del fortín según se desprende del carácter de las heridas que presentaban los cadáveres.<sup>9075</sup> Ultimados estos dos puestos “...dirigíanse a efectuar igual sorpresa a la Gran Guardia General Arenales, pero el teniente Quiroga en conocimiento de los hechos producidos por un soldado que venía de chasque los esperó prevenidos entablándose una refriega de la que resultaron como cerca de 20 indios muertos y heridos gravemente el cacique principal Matolí que murió momentos después”.<sup>9076</sup>

Las escaramuzas continuaron a pesar de la expedición del Coronel Rostagno, perpetuándose el clima de hostilidad que tanto hizo por amortiguar el Coronel Teófilo O'Donnell,<sup>9077</sup> extendiéndose incluso hasta sabotear reiteradamente las líneas telegráficas (Amaya, 2005).<sup>9078</sup>

#### **C-I.-d. Supercherías en las bajas contra el Indio.**

No obstante la seriedad de muchos de los partes elevados por la oficialidad de línea, muchos de ellos adolecían de una hipertrofia nada inocente. El Capitán Alejandro Sarmiento tuvo que lamentar en 1886 “...la pérdida del soldado del referido Batallón José Cabrera que rindió su vida como un valiente peleando cuerpo a cuerpo saliendo herido de flecha punta de hierro en el costado derecho el de igual clase Máximo Orozco”.<sup>9079</sup>

De las averiguaciones practicadas, según consta en la prevención sumaria, que levantó el Mayor Matías Aldasoro de orden del Jefe del Regimiento en 1911, resultó “...que durante el combate sostenido contra los indios matacos, que se encontraban parapetados en sus tolдерías, cayó mortalmente herido el Teniente [José Lorenzo] Brown (25-7-C), en el vientre, por un disparo hecho con balines por los referidos indios, a quienes dicho oficial acompañado del Alférez Granel y 4 hombres había tratado de reducirlos a la obediencia, después de un combate que aquellos habían tenido con otros indios que obedecían a otro cacique”.<sup>9080</sup> Al caer el oficial citado, el Alférez Granel “...asume el mando de ese número reducido de hombres y a pesar de haber recibido varias heridas de balines instantes después en el antebrazo, de su posición desventajosa en relación con la que ocupaban los indios, de la ineficacia de sus fuegos por encontrarse estos ocultos, y al número de fuerzas excesivamente inferior, continuó la lucha, hasta que viendo la inutilidad de sus esfuerzos, y que al Teniente Brown le quedaban pocos momentos de vida, resolvió retirarse con su tropa, a fin de prestarle los auxilios requeridos a dicho oficial, los que fueron vanos pues falleció mas o menos a la hora”.<sup>9081</sup>

Desde el primer combate celebrado por el Teniente Coronel Aristóbulo de Vera con los indios en Noviembre de 1907 hasta el “...muy serio combate en el laberinto de Vaca Corral en que murió el cacique Sacairy el día 9 de Marzo de 1909 y la serie casi diaria de peleas desde el día siguiente 10 en que al llegar a mi fortín tuve sólo tiempo para cambiar montado y salir para el interior por haber sido la mayor parte de los fortines del C.5 pasados a degüello y literalmente masacrados en esa noche del 9 al 10 precisamente en momentos en que yo peleaba en otra parte y cuyo tiroteo fue sentido en los fortines

de los Subtenientes [Enrique] Lupiz (32-29-C) y [José Antonio] Solla (32-44-C) según después me dijeron”.<sup>9082</sup>

Para el Coronel Lindor Valdez (30-4-C), sería largo enumerar “...los pueblos que llevan los nombres de los militares desaparecidos en la inmensa zona que entregamos a la civilización en diversas oportunidades (Existen boletines militares y revistas donde consta lo que acabo de expresar)”.<sup>9083</sup> También son para Valdéz testigo de ello “...los pequeños monolitos que se levantan a la memoria de los caídos en lugares de combate y lugares de asaltados por los indios, tales como los fortines Sargento 1º Leyes (antes Yunka), Coronel Solá, Sargento Agramante, Capitán Solari, Paso de Indios, Cabo 1º Chaves, Nuevo Pilcomayo, etc”.<sup>9084</sup>

Por el contrario, para el General Julio Lagos (45-12-G), en su réplica al Coronel Lindor Valdez fechada en 1946, la supuesta cruenta y sanguinaria lucha en el Ejército de Operaciones en el Chaco produjo en los 34 años de su duración (lapso 1885-1919) sólo las siguientes bajas: “...Muertos: 46, de los cuales 2 ahogados y 8 que fueron en el año 1919 en el desgraciado suceso del asalto al Fortín Yunká, y 59 heridos. Es decir, 1,03 muertos por año y 1,73 heridos en el mismo lapso”.<sup>9085</sup>

## **C-II.- Confinamiento desnomadizador de poblaciones cautivas como dispositivo pretoriano de acumulación originaria.**

La sedentarización forzada resultó fatal para las tribus del Chaco, y siempre lo ha sido para todos los “pueblos sin historia”, cazadores y recolectores, recién incorporados al mundo sedentario y urbanizado, pues siembra el contagio de epidemias, destruye la identidad cultural de un pueblo, y los vuelve vulnerables a la marginación, el alcoholismo y la prostitución.<sup>9086</sup>

En los ingenios azucareros de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, y en los obrajes madereros y las puntas de rieles del norte y del nordeste se podía operar merced a la provisión de mano de obra indígena cautiva o forzosamente desnomadizada y des-etnizada, y a la aproximación de los denominados indios amigos o ladinos, originarios del este del Chaco.<sup>9087</sup> Amén del abaratamiento del flete ferroviario, señalado con acierto por Giménez Zapiola (1975), el proceso de acumulación en la industria azucarera se favoreció también con el abaratamiento de la mano de obra que significó el confinamiento y el consiguiente proceso de desculturización de los contingentes de indígenas enviados desde el Chaco por las sucesivas expediciones militares.<sup>9088</sup>

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el Chaco, el mercado de mano de obra rural se encontraba anémico y tironeado por la simultánea demanda tanto por parte de las Guardias provinciales o nacionales como por los empresarios agro-ganaderos.<sup>9089</sup> Sin embargo, estos últimos podían salvar la penuria de brazos recurriendo a la migración de mano de obra jornalera golondrina o nómada procedente de Europa, la cual era preferida por los colonos y empresarios agrícolas.<sup>9090</sup>

En un principio, para el Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu, no fue la fuerza armada ni la diligencia de los Misioneros "...los elementos que poniéndose en juego, hayan reducido este número de indios, sino su propio interés, creado por la necesidad que de esos brazos tenían los agricultores de las provincias de Salta y Jujuy".<sup>9091</sup> Catequizándolos progresivamente y creándoles cada vez más necesidades, el ánimo de los indios fue predispuesto "...a soportar fríamente tal vez y sin resistencia el que avanzaran las poblaciones cristianas por las costas del río Bermejo, tomándoles sus propios terrenos".<sup>9092</sup> Esta expoliación, que según Uriburu la mayor parte de los indígenas toleró, "...hizo que algunos irreconciliables con el conquistador se alejen sosteniendo perfectamente la lucha".<sup>9093</sup>

Es así que desde 1859 el número de indios reducidos disminuyó considerablemente, "...ya porque algunos se alejan a lugares más remotos y a las más desiertas regiones; ya por sus continuas guerras, que entre ellos son de profundo exterminio, matando instintivamente tanto al guerrero como al niño y azotando todo lo que encuentran a su paso; o ya en fin por las epidemias que sufren, como la viruela y otras que hacen entre ellos horribles estragos".<sup>9094</sup> Uriburu había conocido en 1859 "...más de cuatro mil familias de matacos que habitaban de Orán a la Esquina Grande en la Banda Occidental, y desde Embarcaciones hasta Misiones en la Banda Oriental del mismo río Bermejo y hoy no existen mil de esas familias".<sup>9095</sup>

Los indios según Uriburu se obstinaron "...como se obstinarán siempre en no abandonar sus campos de caza y las costas de los ríos para la pesca, y a pesar de vivir allí en la peor condición, pues como he dicho antes, los dueños de los terrenos ejercían sobre ellos las mayores arbitrariedades, como la de castigarlos, matarlos, y repartir su familia; a pesar de esto, viviendo precariamente de la caza y de la pesca; a pesar de esto, digo, los indios resistieron; muchos se alejaron otros huyeron a sus guaridas a las que no hay más distancia que diez o veinte leguas de Orán, y no fue posible repetir la tentativa, pues carecíamos de recursos, y el vecindario que no comprendía la ventaja de esta medida, resistía por su parte, incitando a los indios a volver a sus tierras".<sup>9096</sup>

Después de todo esto, Uriburu afirmaba que los vecinos individual o colectivamente "...siguieron su negocio con los indios explotando su ignorancia y exacerbándolos con especulaciones innobles, hasta hacerlos abandonar sus tierras y alejarse hasta donde pudieran vivir mejor, en completa libertad y lejos de nuestro contacto".<sup>9097</sup>

Y a fines de dicho siglo XIX, los conflictos por la mano de obra indígena se suscitaron entre por un lado los empresarios ferroviarios y dueños de obrajes e ingenios azucareros, usufructuarios de la Ley de Conchavos, y por el otro el Ejército de Línea, beneficiario de la Ley de Servicio Militar Obligatorio (SMO). Los peones de un dueño de ingenio Tucumano se habían enrolado en el Ejército de línea y "...las autoridades militares se han negado a entregarlos a pesar de las requisiciones del patrón por vía de las autoridades y de la justicia federal".<sup>9098</sup>

### **C-III.- Capitalismo predatorio o colaboracionismo pro-indígena y anti-militar.**

La naturaleza depredadora del capitalismo aventurero prevaleciente, que marcó a su vez el tipo de capitalismo que iba a hegemonizar en la región, se traspasaba en los métodos de intercambio y en los objetos intercambiados.<sup>909</sup> Este apartado lo subdividiremos a su vez en dos ítems: a) reciprocidades de colonos y dueños de obrajes; y b) comercio ilegal de armamentos.

### C-III.-a.- Reciprocidades de Colonos y Dueños de Obrajes.

Existía una íntima comunicación entre los indios incorporados como jornaleros en los obrajes madereros y los indios montaraces, producida con el propósito de defenderse del avance militar. Esta interacción era aceptada por los dueños de los obrajes, pues de otro modo no se habrían podido mantener en funcionamiento, dada la cercanía con las tolдерías. Teniendo conocimiento que "...los indios salvajes reciben aviso por los indios que trabajan en los obrajes de las **partidas volantes** que salen en su persecución", el Capitán Juan Méndez trató en 1887 de "...desorientar a estos marchando hacia el Salado con rumbo a Napalpi".<sup>910</sup>

Extenuada la caballada por la fatiga y la escasez de agua; mermada la manutención por la pérdida de novillos; y dado que ya no era posible alcanzar a los indios, el Capitán Méndez se "...encontraba en las mismas tolдерías que habían sido abandonadas por los avisos que les llevaron los **indígenas peones obrajeros**".<sup>911</sup> Méndez podía asegurar esto "...porque encontré los rastros de cuatro que se fugaron del Obraje del Sr. Delfino, la misma noche que pasé por dicho Establecimiento; los que cruzando campos y bosques por ellos conocidos habían llevado la alarma, y dispersión y **cambio de toldos** a parajes mas lejanos".<sup>912</sup> Sin tener indicio alguno de la dirección que habían tomado lo pusieron a Méndez en el caso de "...volver por otro camino hacia el Obraje de un Señor Núñez, donde tuve conocimiento habían toldos de indios montaraces los que encontré también abandonados de siete a ocho días próximo a la última posta que dicho Sr. tenía fuera de su concesión y que había sido abandonado, por el embargo de maderas o exportaciones clandestinas; y continuando mi marcha en dirección a la última posta que actualmente tiene, en el punto más avanzado de su Obraje, una vez llegué tuve aviso por uno de los peones correntinos, de que próximo al mencionado Obraje se hallaba una Toldería".<sup>913</sup> Inmediatamente Méndez ordenó al Alférez en comisión Don José Ormaechea que "...con diez soldados del Regimiento 6º de Caballería de Línea, la atacan, lo que no puede efectuarse, por que los indios montaraces ya habían dado aviso de mi proximación, y de una manera tan escandalosamente visible que pude cerciorarme como un indio de los que allí trabajaban montó en uno de los caballos del propio Establecimiento y corrió anunciársela para que se retirasen".<sup>914</sup>

La Comisión del Capitán Juan Méndez salió el día 8 de mañana y al cabo de algo más de un día de jornada se encontraba "...en la parte más avanzada del Establecimiento (8 leguas de donde la había desprendido) rodeando a los toldos".<sup>915</sup> A las 5 a.m. del mismo día 9 cuando regresaba la comisión, habiendo sorprendido sucesivamente los toldos de los Caciques Pichón de fierro, Pichoncito y Vitó, se le incorporó "...a las 4 y 25 minutos p.m. del mismo día 9 en el Establecimiento principal del mencionado Sr. Núñez trayendo ciento cuarenta y seis personas entre indios de lanza, mujeres y niños, dos caballos, siete fusiles fulminante, un fusil Remington, con la marca siguiente P X C. cuatro arcos y doce flechas; este último armamento perteneciente a tres indios y una india montaraz que dispararon al monte al ser sorprendidos en la Posta de Pichón de

Fierro, y que según declaración, constantemente vienen indios salvajes a comerciar con los que se dicen mansos”.<sup>9106</sup>

Al atardecer (las 5 p.m.), el Capitán Juan Méndez se presentó en la casa del Sr. Núñez y le pidió personalmente “...quisiera tener a bien formar los indios que allí había y que según declaración de su principal capataz Mariano se encontraban acusados. El Sr. Núñez negó rotundamente a mi pedido, diciéndome se habían escapado los que suponía culpables; pero su aseveración era incierta, porque me consta que dichos indios se encontraban aislados en el interior de sus habitaciones”.<sup>9107</sup>

### **C-III.-b.- Comercio Ilegal de Armamento.**

La dinámica de reciprocidades e intercambios patrimoniales entre los administradores o dueños de obrajes y los indios montaraces se veía fortalecida por las ventas de armas que se hacían en las postas de los obrajes. El Capitán Juan Méndez sabía en 1887 que las postas de los obrajes de Delfino y de Núñez “...revendían armas [fusiles de retrocarga y avan-carga] y municiones a los indios montaraces por los indios Noconay, Mariano, Sanochi, Aceiteva, Vito, Lenaqui, Oquenari, Chitalay, Nelnoqui, Ninay, Calori, y Pi”.<sup>9108</sup> Sabía Méndez también los nombres de los individuos “...con quienes el señor Núñez mandaba prevenir a los capataces para que ocultasen los indios montaraces y los soldados desertores que abrigan en sus postas cuando salían comisiones, de los que “...como no se ocultará a V.S. mantienen continua comunicación con los montaraces del interior de este Territorio, y en consecuencia juzgue conveniente dar un golpe seguro, que diera por resultado la toma de todos los individuos complicados en este comercio criminal donde se juega con la vida de los soldados de la Nación, y se hace duradera una guerra que cuesta ingentes sumas de dinero a la República”.<sup>9109</sup>

### **C-IV.- Conclusiones**

Una vez alcanzada una institucionalización educativa de cariz meritocrático y cuando el orden burocrático-republicano intentó extenderse infructuosamente a escala nacional, comenzaron a multiplicarse los centros de gravedad, y a imponerse en la periferia fronteriza un orden predatorio, en el contexto de un modelo militar de connotaciones esquizofrénicas, pues era por un lado meritocrático, y por el otro simultáneamente burocrático-patrimonialista. Este modelo tuvo sus primeras armas en la esfera territorial y sus víctimas en el eslabón más débil consistente en las poblaciones originarias.

Así como la conquista del Chaco generó una expansión del espacio colonizado, también es cierto que dicha expansión tuvo una repercusión doble. Por un lado provocó en las comunidades originarias una interacción y una reciprocidad cada vez más intensa con colonos y empresarios obrajeros, la cual revelaba como estos últimos sacaban provecho de unos y otros, particularmente de los caciques, quienes los proveían de la mano de obra indígena jornalizada, y la garantía de una paz precaria a cambio de armas y vituallas. Y por el otro, gestó una poderosa fuerza gendarme o pretoriana, que habría de ser repetidamente utilizada en las intervenciones federales a las provincias vecinas, especialmente a la provincia de Corrientes.

## Capítulo IV-A-4 Vestigios estamentales en el seno de una modernidad republicana traicionada

### Índice del Capítulo IV-A-4

- D.- Vestigios estamentales en el seno de una modernidad traicionada
  - D-I.- Fuero militar como dispositivo de impunidad.
  - D-II.- Expulsión y reclusión como dispositivos de encubrimiento.
    - D-II-a.- Estereotipación de conductas y reclusión en el Depósito Correccional de Menores.
    - D-II-b.- Sodomización compulsiva.
    - D-II-c.- Estrategia de autodefensa o chantaje.
    - D-II-d.- Encubrimiento e impunidad facciosos.
  - D-III.- Nepotismo como dispositivo endogámico (1870-1932).
  - D-IV.- Conclusiones.

### Palabras Claves

Corrupción militar--cortesía militares--Depósito Correccional de Menores--encubrimiento faccioso--encubrimiento militar--endogamia militar--esclavitud infantil--estrategia de autodefensa o chantaje--favoritismo militar—fuero militar--honor familiar--Impunidad facciosa—modernidad inconclusa--masculinización militar--mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar--mercenarismo y enganche como mecanismo corruptor y represivo—Nepotismo militar—orden meritocrático--prebendario--prebendalismo--prevaricación o simonía militar--sexualidad militar--sodomización compulsiva.-

### Keywords

Family honor—meritocratic-prebendary order--military corruption--military courtesy--military favoritism--military simony--military sexuality--military cover-up--military endogamy—military nepotism—incomplete modernity--infant slavery--self-defense strategy--bounty system--compulsive sodomy--minors deposit—prebendalism.

### D.- Vestigios Estamentales en el seno de una Modernidad Inconclusa

La persistencia de vestigios o secuelas de antiguas formas de dominación tradicional, subsistieron en el seno de la modernidad y de los nuevos órdenes político-sociales.<sup>9110</sup> En América Latina, la adquisición venal o soborno de lealtades militares, expresado en los premios y/o certificados de tierras, se asemejaba mucho a la de la compra-venta de indulgencias o simonía ocurridas en el seno de la Iglesia, y también ¿porqué no? a la compra-venta de fallos o sentencias judiciales tipificada como prevaricación en el ambiente judicial. En ese sentido, en la Provincias Unidas del Río de la Plata, desde la desmovilización y debacle del Ejército Nacional Republicano, en las postrimerías de la guerra contra el Imperio del Brasil (1828), se padeció de una vulnerabilidad moral que se profundizó con el tiempo a escalas imprevisibles, alimentando una impunidad institucionalizada, y un tipo de estado patrimonial-prebendario.<sup>9111</sup>

Expulsado el caudillismo Rosista (1852) y desatada la guerra contra el Paraguay (1865-69), estas vulnerabilidades renacieron con la desmovilización de los ejércitos producidas al final de la Guerra de la Triple Alianza (1869) y de la Guerra contra el caudillismo de López Jordán (1873), y se acentuó luego de la denominada Conquista del Desierto (1880) con la esquizofrenia del discurso militar oficial, entre meritocrático (Ley de Ascensos, 1882) y prebendario (certificados de tierras, 1888). Paralelamente, el influjo del moderno imaginario socio-darwinista, difusor de la inferioridad indígena y mestiza y de la jerarquía de razas adelantadas y sometidas, adocenó ideológicamente la lealtad de los cuadros de oficiales.<sup>9112</sup> El Colegio Militar no podía quedar exento ni ajeno al juego ni a la deformación de estos dispositivos, que afectaron dichos estados y dichos ordenes institucionales, que hemos comenzado a bosquejar en los dos capítulos anteriores, y en muchos casos recayó en la reproducción de los mismos vicios que vinieron a remediar.

La proliferación de dispositivos de impunidad, encubrimiento, favoritismo y nepotismo amenguó la moral y sembró la semilla de la conspiración. Refiriéndose a las conspiraciones militares, y tomando como ejemplo la ocurrida en el Campamento de Santa Catalina (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires), a fines de septiembre de 1892, la cual vino a delatar la pérdida del liderazgo militar del general Roca, y estuvo destinada a socavar la asunción del mando de la fórmula ungida por el Acuerdo Roca-Mitre, Grapho, seudónimo de un militar que bien podría tratarse de José M. Castro Sundblad, dio a entender, en *El Diario* de Láinez, que la conspiración es "...un mal latente que ha venido fomentando el gobierno con el **favoritismo**, que ha dividido el ejército en **dos partidos**: el de los **agraciados** y el de los **descontentos**".<sup>9113</sup> Este favoritismo vino a relajar "...la disciplina y el temple rígido del espíritu militar. Agregase a esto, el ambiente de convulsión política que envuelve y deprime esa institución, y se tendrán las causas que alimentan estas perturbaciones, que tienden a condensarse en motines, felizmente, hasta ahora, sin haber conseguido tener trascendencia".<sup>9114</sup>

Pero estos círculos de conspiración militar, que según Grapho "...se hacen y deshacen como **globos de jabón**, que unas veces se desinflan solos, y otros los revienta el gobierno, son un síntoma gravísimo, que revela la fuerza interna de descomposición que mina el ejército en su disciplina y obediencia, y que en circunstancias propicias puede asumir la magnitud de un gran conflicto. Hasta ahora no han tenido trascendencia, siendo tentativas remotas y posibles; pero el mal es contagioso, se infiltra, se propaga y su proceso si no hace prosélitos, relaja el servicio de la ordenanza y de la moral militar sin los cuales los ejércitos degeneran en monotonía".<sup>9115</sup>

La Conspiración de Santa Catalina (1892), era para Grapho "...uno de tantos incidentes del **estado morbo del ejército**; no es el grano que revienta el que nos debe asustar, es la causa orgánica, latente que lo fomenta, el que debemos conjurar sin aspavientos, sin pusilanimidad que podría llevarnos a extremos contraproducentes, como los **estados de sitio**, que una tímida impresionabilidad ha sugerido al gobierno, asustándolo con el espectro de revoluciones sangrientas, que han resultado después ser fantasmas de una medrosa fantasía".<sup>9116</sup>

Una vez difundido el clima de corrupción, favoritismo y nepotismo, se fueron contaminando las diversas transacciones que en negociación cotidiana trababan las autoridades del Colegio Militar y su Compañía de Cadetes con las instancias del poder

burocrático, tales como la Comandancia de Armas, el Depósito Correccional de Menores, la Capitanía General de Puertos, la Comisión Superior de Vigilancia, y la Fiscalía de Instrucción Militar; así como con otras esferas de dominio, como la esfera política (Poder Legislativo, partidos políticos), burocrática (Correos y Telégrafos, Tierras y Colonias), y religiosa (Vicariato Castrense); e instancias de poder militar externas a la vida del Colegio, tales como el Ministerio de Guerra, las Oficinas de Enganche, la Guardia Nacional, el Depósito de Reclutas, la Comisión para Compra de Armamentos en Europa, el Tribunal de Clasificación de Servicios Militares, y el Estado Mayor General del Ejército.

Entre los dispositivos de naturaleza estamental aún prevalecientes en los órdenes patrimonial y burocrático se destacan aquellos que produjeron impunidad, encubrimiento y endogamia. La impunidad se muestra elocuentemente en el tratamiento que se les dio a los que usufructuaron del fuero militar, el encubrimiento en los que incursionaron en abusos sexuales, y la endogamia en la frecuencia e intensidad del favoritismo o del nepotismo.

Este cuarto capítulo lo dedicaremos a estos dispositivos, esferas e instancias y para ello la dividiremos en tres apartados: 1) Fuero militar como dispositivo de impunidad; 2) Expulsión y reclusión como dispositivos de encubrimiento; y 3) Nepotismo como dispositivo endogámico (1870-1932).

#### **D-I.- Fuero militar como dispositivo de impunidad.**

El privilegio del fuero militar alimentó la soberbia e impunidad corporativas.<sup>9117</sup> En esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar (1894) ni el Código Bustillo (1898), la impunidad de los delitos cometidos por militares estaba garantizada en los juzgados castrenses o tribunales de guerra por las estipulaciones consagradas en el Compendio de Colón de Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta (1858).<sup>9118</sup>

Si bien los miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la Constitución Nacional también estaban contradictoriamente inmunizados por un fuero especial o tribunales ad-hoc, al igual que hoy lo reclama en el Cono Sur el Pentágono para poder realizar maniobras conjuntas. Ese fuero especial era el que emanaba del decreto real del 9 de febrero de 1793, que establecía el Fuero Militar o fuero de guerra en los ejércitos de España y ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales castrenses de los militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, es decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.<sup>9119</sup>

#### **D-II.- Expulsión y reclusión como dispositivos de encubrimiento militar.**

A su vez, el encubrimiento militar lo subdividiremos en cuatro rubros: 1) Reclusión en el Depósito Correccional de Menores; 2) Sodomización compulsiva; 3) Estrategia de autodefensa o chantaje; y 4) Encubrimiento e impunidad facciosos.

#### D-II-a.- Estereotipación de conductas y reclusión en el Depósito Correccional de Menores.

No obstante el prestigio creciente del Colegio Militar, sito en ese entonces en Palermo (Buenos Aires), a partir de la derrota de la Revolución Liberal Nacionalista de 1874, donde habían participado algunos cadetes que fueron expulsados, y la renuncia del coronel Juan Czetz a la dirección del Colegio, se comenzó a generar un clima permisivo que derivó durante la gestión directiva del coronel Mariano Moreno en diversas promiscuidades, que culminaron en casos de sodomización compulsiva.<sup>9120</sup>

La producción de estos lastimosos eventos –ignorados en la obra de García Enciso (1970)-- nos reveló la existencia de una estereotipación estigmatizante de ciertas conductas, tipificadas como asociales, y también de un archivo reservado del Colegio, que se extendería hasta la misma actualidad, donde sólo algunos casos habrían quedado reflejados en las Ordenes del Día.<sup>9121</sup> La homosexualidad era tipificada como **pecado nefando**, y los cadetes hallados in fraganti cometiendo dicho **pecado** eran remitidos en calidad de presos a disposición de la **Capitanía General de Puertos**, para ser reenviados como expulsados al **Depósito Correccional de Menores para marineros**.<sup>9122</sup> Entre los primeros incursos en esta figura penal militar nos encontramos con individuos como Santiago Castilla y Diego Cruz Brittain, nieto de algún esclavo del comerciante británico James Brittain, de larga y trágica vivencia en el Río de la Plata.

Al frente del organismo portuario se hallaba el Dr. Diego Gregorio de la Fuente, y al cesar en su mandato como Capitán General de Puertos, en 1865, fue reemplazado por Carlos Alberto Mansilla, hijo del General Lucio N. Mansilla, quien se había hecho cargo interinamente de la Institución, siendo confirmado en julio de 1880.<sup>9123</sup> En su renuncia como Encargado del **Depósito Correccional de Menores**, Juan B. Zunzunegui revela la existencia de **trabajo esclavo infantil**, pues menores de 8 a 16 años de edad pasaban todo el día trabajando obligatoriamente en la carga y descarga del carbón para la Armada Nacional, sin que tuviesen siquiera "...una buena cama donde poder reposar de las fatigas a que se los tiene condenados, pero ni aún esto disfrutaban estos desgraciados a excepción de 2 o 3 a quienes sus respectivas familias cuidan de proveerlos de colchones para dormir. Los demás apenas si tienen una miserable manta para cubrir sus miembros y esto a expensas de las mismas familias, en tanto que los mas duermen sobre tablas sucias y ásperas expuestos a la intemperie y a la lluvia, pues el buque hace agua hasta por los poros de las maderas".<sup>9124</sup>

Como consecuencia de ese clima represivo se fueron gestando entre las promociones de jóvenes aspirantes a oficiales círculos informales de poder consistentes en logias o sociedades estudiantiles secretas.<sup>9125</sup> Y de resultados de dichos círculos se reprodujeron episodios que podríamos definir como de violencia originaria, que culminó en abril de 1877 con nuevas expulsiones y destituciones.<sup>9126</sup> Sin embargo, la buena conducta ulterior hizo que el nuevo Director Coronel Julio de Vedia reviera las medidas y levantara los castigos.<sup>9127</sup> Aparentemente, esta generosa indulgencia fue contraproducente pues al poco tiempo dichos círculos volvieron a sus andanzas.<sup>9128</sup> La escasa información hasta ahora rescatada parece insinuar la existencia de una violencia sistemática alimentada por el encubrimiento de actos deleznales, en lo que en la jerga se conocía como manteada o choteada, prestamente ocultada y encubierta.<sup>9129</sup> Para peor, con motivo de los sucesos revolucionarios del 80, y so pretexto de ponerlos a salvo, los cadetes son enviados a Martín García. Por ese motivo, el Colegio sufre la deserción de

numerosos alumnos que toman partido contra la federalización de Buenos Aires.<sup>9130</sup> Pero luego de la derrota del Gobernador Carlos Tejedor, el Colegio y sus cadetes persistieron en los cálculos conspirativos de los actores políticos en juego.<sup>9131</sup>

#### **D-II-b.- Sodomización Compulsiva.**

Como es sabido el control de la vida higiénica y recreativa de los cadetes en el Colegio Militar era una preocupación que las autoridades del Colegio y de la Comandancia de Armas habían institucionalizado, al influjo de las corrientes higienistas en boga durante la hegemonía del imaginario socio-darwinista. Todos los días desde diciembre de 1870 las autoridades del Colegio conducían a los cadetes a la desembocadura del Arroyo Maldonado en el Río de la Plata, al compás de un tambor con redobles de candombe, para brindarles el privilegio de contar con baños matinales.<sup>9132</sup> Seis años después, llegar al río se hizo más difícil pues con motivo de la iniciación de las obras de remodelación del Parque 3 de Febrero se prohibió al alumnado internarse en él, salvo que lo hicieran acompañados por un oficial.<sup>9133</sup>

A los efectos de un control de la recreación y de la sexualidad, también se había establecido una prohibición terminante de traspasar los lindes perimetrales del Colegio. Esa prohibición se enfatizaba en los horarios nocturnos, para evitar la tentación de concurrir a bailes, fandangos y casas de tolerancia existentes en los alrededores o en el propio centro de la ciudad, al cual se accedía mediante el tramway que corría por la Av. Santa Fé, o a través del apeadero ferroviario.<sup>9134</sup> Dicha prohibición se extendía a toda hora para evitar "...separarse más allá de los límites marcados por los rieles del Ferro-Carril del Norte", que separaba al Colegio Militar del Arroyo Maldonado (hoy corre cubierto por la Av. Juan B. Justo) y su desembocadura en el Río de la Plata. En este espacio geográfico es donde durante los días de fiesta o feriados, ocurrían unas prácticas compulsivas y violentas en desmedro por lo general de los físicamente más débiles.<sup>9135</sup> Estas prácticas de acoso sexual también ocurrieron en la Isla de Martín García en oportunidad de viajes de instrucción, en la oscuridad del bosque de Palermo; y asimismo, pero de un modo consentido, en la nocturnidad de la cuadra.<sup>9136</sup> La estrechez de los dormitorios, que a partir del segundo año se segregaba por arma, y la extrema proximidad de las literas entre sí, era para el Director del Colegio Coronel Nicolás H. Palacios un verdadero peligro para la moral.<sup>9137</sup>

En ámbitos antropológicos se asigna a la sodomía compulsiva un origen ritual de iniciación o pasaje; estrechamente asociado con las numerosas apelaciones a lo sexual como forma de dominación, "...desde comparaciones del pene con el fusil (entendido como arma de ataque y control), hasta vinculaciones entre la defensa de la pureza e integridad sexual de la novia o la madre con la patria".<sup>9138</sup> En medios psicológicos y psicoanalíticos se le atribuye a la cultura militar una valoración distorsionada de la virilidad, que mutila radicalmente la eroticidad, al concentrarla en el pene, en la penetración y en el orgasmo.<sup>9139</sup> Y en círculos psiquiátricos se asigna a los autores de la sodomía compulsiva una suerte de pulsión castratoria del otro.<sup>9140</sup> Pero para una caracterización de orden criminal o penal es fundamental determinar el dolo de los victimarios así como la inocencia de las víctimas.<sup>9141</sup>

En el caso aquí estudiado (el de los Aspirantes César Cerri y Felipe Goulú, de 16 años de edad, ocurrido en noviembre de 1880, y pertenecientes en ese entonces al tercer año del Colegio), el formulario de preguntas del oficial sumariante y del Fiscal Capitán

Fanklin Rawson pareciera no distinguir entre los actos sexuales consentidos, que remite como precedente a la civilización de la Antigua Grecia; y los actos compulsivos o castratorios, que reenvían a la horda primitiva.<sup>9142</sup> En cuanto a la caracterización del episodio que aquí estudiamos, los victimarios no lo atribuyen a un acto de violencia sino a una broma o chacota.<sup>9143</sup> En ese sentido, es preciso tener en cuenta que caracterizar el hecho imputado como broma tiene sus propios límites y riesgos por cuanto para ello el acto debería estar marcado sólo por una naturaleza puramente ocasional y por una conformidad mutua o connotación consensual.<sup>9144</sup> Si por el contrario, el acto fue compulsivo y reincidente, como lo prueban los testimonios de los acusadores, y tuvo derivaciones delictivas preterintencionales necesariamente dejó de ser una mera broma y pese a que no se habría consumado el coito (en el caso de no haber existido penetración), el hecho debió padecer necesariamente de un ingrediente de profunda humillación y degradación.<sup>9145</sup> En estos casos de bromas sexuales, se sabe como comienzan pero nunca como culminan. Por último, las declaraciones de las víctimas y de los victimarios están mediadas por el léxico y la interpretación semántica del oficial sumariante y del escribano que redactó las actuaciones.<sup>9146</sup>

Los testimonios de los acusadores revelan que el primero de los citados Aspirantes dominaba la técnica del acoso pederasta, al voltear y sumergir a sus víctimas menores en el agua del arroyo, al extremo de ejercer una docencia de la misma, oficiando de entregador para la iniciación sexual de su amigo cadete.<sup>9147</sup> Es indudable que no hacían otra cosa que reproducir pautas de conducta que habían sufrido otrora o que habían visto ejercer en otros camaradas. Los Aspirantes víctimas del acoso pre-sexual y/o sexual eran los más jóvenes, de 12 a 15 años de edad, la mayor parte provincianos, sin familia en Buenos Aires, y a quienes el lapso del fin de semana no les alcanzaba para ir y volver de sus localidades de origen.<sup>9148</sup> Es decir, en el acoso existió entre los actores una diferencia o distancia etaria que alcanzaba a un período de cinco o seis años, o hasta de seis promociones.<sup>9149</sup>

Como consecuencia de estos escándalos el Ministro de Guerra Benjamín Victorica tuvo que crear una **Comisión Superior de Vigilancia**.<sup>9150</sup> Esta Comisión, que nada tenía que ver con la Comisión Examinadora y con la Comisión Superior Inspector, debía “...visitar tres veces por año el establecimiento sin previo aviso, informando el cumplimiento de reglamentos y ordenanzas”.<sup>9151</sup> Como se comprenderá, la creación de dicha Comisión debía obedecer a razones más graves que la mera existencia de accidentes mortales por causas fortuitas.<sup>9152</sup> Los primeros criminólogos argentinos (Escobar, Gómez, Ingenieros), seguramente estuvieron al tanto de este escándalo de proporciones del que nadie hasta ahora ha hablado (ni siquiera el historiador del Colegio Gral. García Enciso), pues concluían que los establecimientos educativos pupilos o internados eran “peligrosos semilleros de prácticas homosexuales”.<sup>9153</sup>

#### D-II-c.- Estrategia de autodefensa o chantaje.

Es ampliamente conocido como la homosexualidad consentida ha sido en la historia materia de chantaje o presión sobre quienes incurrieran en estas prácticas de forma clandestina y anónima. Ventilar secretos, hablar más de la cuenta, contar todo lo que se sabe, con el objeto de perjudicar a una o más personas descubriendo confidencias o intimidades que dichas personas se cuidan de guardar escrupulosamente es la estratagema más común por parte de quien busca defenderse como sea. En el caso particular que investigamos, la estrategia de autodefensa adoptada por el imputado

César Cerri, para sortear las derivaciones del sumario, fue el chantaje. Cerri denunció otros supuestos casos existentes, todos ellos de naturaleza consentida, y por ello radicalmente distinta de la imputada a su persona.<sup>9154</sup> Una estrategia que no se puede dudar en calificar de perversa, mediante la cual se ejercía presión sobre el fiscal que llevaba la instrucción del sumario y sobre las mismas autoridades del Colegio, respecto de medidas disciplinarias que tarde o temprano se debían implementar.

La ventilación de secretos íntimos que pueden dañar la estima y la reputación de otras personas y/o autoridades se suele parangonar con la actitud de acercar estiércol al ventilador, para que se propague hacia todos los confines posibles, y de esa forma perversa lograr tapar o cubrir el entuerto. De no ser posible ello, al menos intentar que se reparta el peso de ser asociado a la condición incómoda de personaje emblemático. Con esos aviesos propósitos, nuestro imputado Cerri delataba el nombre y apellido de aquellos testigos que podrían revelar la existencia de casos ocurridos con anterioridad, refiriéndose al parecer a un episodio ocurrido tres años antes --en 1877-- cuando reinaba el círculo denominado “Los Chichones”, oportunidad en que fue victimizado el Aspirante Francisco Chouciño (6-4-A).<sup>9155</sup> La consecuencia inmediata del hecho ocurrido a fines de 1880 fue la baja voluntaria o involuntaria de algunos de los cadetes implicados, del principal victimario y de sus denunciantes.<sup>9156</sup>

#### **D-II-d.- Encubrimiento e Impunidad Facciosos.**

Los sumarios por los delitos cometidos dentro de la institución eran instruídos por la Fiscalía de Instrucción Militar. En ese cargo se desempeñaba el Capitán Franklin Rawson. El Fiscal de Instrucción Rawson había logrado iniciar unas agresivas actuaciones sumariales que no distinguían la sodomía consentida de la compulsiva, por estar distorsionadas por los sesgos masculinizantes y machistas de la época.<sup>9157</sup> Sin embargo, al poco tiempo Cerri logró ser reincorporado, graduándose en 1884, y haciendo toda la carrera militar hasta retirarse con el grado de Teniente Coronel.

Estos obscenos precedentes, desataron al año --en abril de 1882-- los ataques del periodismo, los cuales según el Director Simón Santa Cruz alimentaron la “desmoralización e insubordinación”.<sup>9158</sup> Se manifestaba en constantes rumores o chismes y en la circulación de anónimos dejados en muros, baños y calabozos.<sup>9159</sup> El clima de crisis se acentuó durante el mes de agosto y tuvo un primer estallido el día 6 de septiembre. Recaído el Parte de la insubordinación, el gobierno firmó el 12 de septiembre un Decreto por el cual se desplazó al Comandante de la Compañía de Cadetes Sargento Mayor Francisco Smith y al Vice-comandante de la misma compañía Capitán Ricardo Mulleady, aduciendo para ello la “...familiaridad que existe entre clases y cadetes”, pertenecientes a las Promociones 9ª y 10ª, así como el haber conservado con el incentivo jerárquico de cabo, sargento y distinguido a cadetes “...cuyas faltas enumeradas por las relaciones detalladas que se acompañan no los hicieran acreedores a tal distinción”.<sup>9160</sup> En la concepción dominante, la “familiaridad” como la “murmuración” inhibían la necesaria obediencia del subalterno al superior, por aquello que “...la obediencia disminuye a medida que la víctima se aproxima al sujeto”.<sup>9161</sup>

Pero el remedio hallado fue peor que la enfermedad, pues al desplazar a dos destacados comandantes --respetados y queridos por el alumnado-- derivó en una nueva

“...insubordinación tomando el carácter de una sublevación”, pero esta vez más grave pues estaba motorizada por los integrantes de las propias clases (cabos, sargentos y distinguidos), que habían sido ascendidos por obra del Sargento Mayor Francisco Smith.<sup>9162</sup> Finalmente, merced a una batería de castigos (calabozos y expulsiones) y a un nuevo decreto firmado por el Ministro de Guerra y por el Presidente Roca el orden se reestableció.<sup>9163</sup> Cuatro años después, en 1886, se reiteraron injurias y mientras que los que habían incurrido en actos de sodomía compulsiva fueron reincorporados, los sospechados de calumniar eran expulsados.<sup>9164</sup> Aquellos que eran exonerados se les arreglaban para incorporarse a la Escuela de Cabos y Sargentos, espacio que les aseguraba una rápida graduación y la posibilidad de ser así incorporados o dados de alta en las unidades del propio Ejército.<sup>9165</sup>

Los acusados de ser sujetos pasivos de actos reñidos con la moral prevaleciente eran estigmatizados y patologizados, y enviados al **Depósito Correccional de Menores**, por considerarse que padecían de mayor inestabilidad emocional, donde se los sometía a una suerte de **esclavitud infantil**. Por el contrario, los acusados de ser sujetos activos eran indultados con el encubrimiento de las autoridades.<sup>9166</sup> Dicho encubrimiento estaría enquistado en todas las fuerzas armadas, en especial en sus institutos educativos, al extremo de constituir sus autoridades una suerte de logia secreta, por cuanto la mayoría de los sindicatos como partícipes de esa actividad furtiva, efímera e invisible habrían alcanzado las más altas jerarquías de la institución. El Tribunal de Clasificación de Servicios Militares, dependiente del Ministro de Guerra, que trató el ascenso de los involucrados en el particular caso que detalladamente estudiamos debió haber tropezado necesariamente con el sumario de marras.<sup>9167</sup>

### **D-III- Nepotismo como dispositivo endogámico (1870-1932).**

Para Weber por endogamia debe entenderse el desarrollo de la actividad comunitaria en el que predominantemente “...sólo se aceptan como compañeros iguales a los descendientes endógenamente engendrados”.<sup>9168</sup> En el ejército argentino clanes militares existieron desde su mero inicio. Halperín Donghi (1978) destaca como mediante casamientos entre familias de militares se fueron formando los clanes de los Balcarce, Álvarez Thomas, Soler, Pinedo, Quintana, Olavaria y Vedia.<sup>9169</sup>

Más de medio siglo más tarde, y desde su creación en 1870, el Colegio Militar de la Nación se destacó por contar con un régimen de reclutamiento muy restrictivo que favorecía la incorporación y promoción de aquellos cadetes que provenían de familias de militares, o que procedían de las propias unidades militares, a título de agregados. Con el correr del tiempo y merced a la derrota de las insurrecciones cívico-militares esta pauta de reclutamiento endogámico fue acentuándose, hasta culminar con la formación de una suerte de corporativismo o casta militar. La endogamia alimentó el aislamiento del ejército respecto de la sociedad civil, reforzó la creencia en la superioridad de las virtudes castrenses por encima de las de la civilidad, y acentuó el hiato estamental entre la oficialidad y las clases.

La Tabla T-I y los Listados L-III y L-IV revelan la frecuencia con la cual se repitieron los apellidos de los Guerreros del Paraguay (1864-68) y la de los graduados en el Colegio Militar entre los años 1870 y 1930. Por dichos listados sabemos que 688

oficiales sobre un total de 1647, o el 40% de los Guerreros del Paraguay mencionados en la obra electrónica de Figueroa, tienen sus mismos apellidos repetidos entre los graduados del Colegio Militar, y que 706 graduados sobre un total de 2954 cadetes, o la cuarta parte (25%) de estos últimos, mantuvieron entre sí en el período 1870-1930 estrechos vínculos de parentesco. Como resultado de esta endogamia, se fueron construyendo verdaderas dinastías, clanes o linajes de militares, originarios de diferentes provincias, que se reforzaron con la costumbre de permitir que los hijos de oficiales elijan el arma de sus padres, que el Listado L-V ilustra sobradamente. También se reforzó dicha endogamia construyendo una versión épica o romántica acerca de sus orígenes heroicos, que los vinculaba con un guerrero fundador próximo o remoto (Guerra de Independencia, del Paraguay o del Desierto), que reforzaba su honor familiar, y su posición y status. Cabe aclarar que estos mecanismos endogámicos también se dieron en ese entonces en otras profesiones, tales como la jurídica y la médica, aunque sin las consiguientes repercusiones políticas, que sí tuvieron con la milicia.

No obstante la relevancia de estos guarismos, los porcentajes adelantados deben ser muy inferiores a los reales por cuanto para su cálculo no se tomaron en consideración los parentescos matrilineales, por implicar ello la necesidad de verificar los apellidos maternos, no siempre aclarados en las fojas de servicio; y sólo se estimaron los parentescos patrilineales. Asimismo, de estos últimos fueron excluidos los apellidos patronímicos simples por la dificultad de corroborar sus mutuos parentescos.<sup>9170</sup> De igual modo, se excluyeron aquellos otros apellidos que --sin ser patronímicos-- debido a su difusión generalizada desde tiempos coloniales se han vuelto equivalentes a los patronímicos.<sup>9171</sup>

La sospecha de la existencia de una casta militar y la conciencia de su vigencia comenzó a corroborarse una vez producido el golpe de estado de 1930. En pleno ambiente conspirativo contra la dictadura de José Félix Uriburu (1930-32), la subsistencia de una casta privilegiada en el ejército argentino, o su creciente aristocratización u oligarquización, era reconocida en un *Pasquín* dirigido a los Suboficiales en 1932, como una fatalidad o hecho consumado. Dicha casta "...ha sido implantada, desgraciadamente, por los ministerios de los generales Agustín P. Justo y Francisco Medina y se vislumbra ya, que prosperará enormemente con este ministerio, tan reaccionario como aquellos".<sup>9172</sup> A esta aristocracia u oligarquía se debe "...la imposibilidad de que el suboficial tenga un mayor horizonte para su limitada vida militar. Hay que luchar por la desaparición de esta casta que sólo ha servido para que el pueblo odie a su ejército".<sup>9173</sup>

Por el contrario, los propósitos que perseguían varios miembros destacados del Radicalismo e incluso algunos militares "...es reorganizar el ejército, por leyes adecuadas y modernas, transformándolo en lo que debe ser: "en un ejército esencialmente democrático".<sup>9174</sup> El ejército argentino, como todos los ejércitos del mundo, "...debe tener en el cuadro de oficiales a personas que hayan sabido triunfar en base a sus propios méritos, sin tenerse en cuenta el origen".<sup>9175</sup> Democratizar e implantar un régimen meritocrático suponía entonces tener que desestamentalizar, despatrimonializar y desburocratizar las instituciones militares. El aprendizaje adquirido en el Colegio Militar no podía ni debía "...tener privilegio sobre el que se obtiene en la ruda labor práctica y diaria de las filas".<sup>9176</sup>

Tanto el ejército argentino de nuestra independencia, "...como el no menos glorioso que, con sus expediciones al desierto, arrasó al salvaje para dar curso a la civilización [sic], han sabido conquistar gloria y laureles en los campos de batalla, comandados por oficiales y jefes de humilde origen y surgidos de las filas".<sup>9177</sup> Porqué, se preguntan los autores del *Pasquín* "...¿no ha de tener nuestro ejército actual esa misma característica, destruyendo la barrera que obstruye la continuación de la vida militar del suboficial, impuesta por un sentimiento aristocrático y de privilegio?".<sup>9178</sup> Para ello, el *Pasquín* agrega que "...Hay que buscar adherentes "...entre los camaradas para realizar esta obra grande e imperecedera. Hay que ser reservado y prudente en las conversaciones. Hay que cuidar de los reaccionarios que tratarán de buscar argumentos ficticios y de toda especie para transformar estos propósitos y presentar ante vuestros ojos y la opinión pública, cuadros terribles del futuro social y de la anarquía en la institución".<sup>9179</sup>

No dejarse engañar "...Un ejército democrático es la expresión fiel de un pueblo democrático. Pueblo es la significación del poder. Ejército es la materialización de la fuerza. Pueblo y ejército debe ser sólo uno".<sup>9180</sup> No es difícil "...que algún suboficial, débil de carácter, cometa el error de dejarse embaucar por los reaccionarios y coopere para la destrucción de estos ideales. Si eso sucede, debéis perdonarlo y mantenerlo alejado de vuestras deliberaciones. Algún día se arrepentirá y el mayor daño que sufrirá será ver el triunfo de su propia clase".<sup>9181</sup>

Insta dicho *Pasquín* a trabajar silenciosamente, como corresponde, "...sin ostentaciones tontas, para vencer a las aristócratas reaccionarios y para realizar estos propósitos. Ampliación del horizonte de la vida militar del suboficial, el que podrá llegar a la categoría de oficial. Mejoramiento económico y social del suboficial".<sup>9182</sup> Concluye el *Pasquín* invitando a luchar por la desorganización del ejército actual "...transformándolo en un ejército democrático, disciplinado, prescindente de la actividad política y dedicado exclusivamente a su misión científica y constitucional. Identificar al ejército con el pueblo".<sup>9183</sup>

#### D-IV.- Conclusiones

El orden oligárquico-predatorio y el control de la diversidad de polos de poder no fue posible perpetuarlo sino mediante una fuerte presencia de diversos dispositivos, entre los cuales se destacaron aquellos vinculados con la impunidad de actos lesivos a la dignidad humana y ciudadana. Dichos dispositivos incluyeron: fueros especiales y amasijo del espíritu de cuerpo mediante instrumentos de endogamia corporativa, todos los cuales arrastraban fuertes cuotas de corrupción que terminaron por infectar la república aristocrática y desatar la pérdida de legitimidad política del grupo social dominante.

A continuación estudiaremos en la Sección III tanto la política de reacción o resistencia cívica revolucionaria (popular y democrática) como la estrategia del abstencionismo armado (1890-1905).

#### Epilogo-Sección IV-A

Indudablemente el Colegio Militar de la Nación se erigió en un comienzo como el paradigma de un orden meritocrático emergente, que supuestamente se iba a difundir al resto de las instituciones armadas, con el ulterior propósito de lograr el monopolio nacional de la violencia legítima. Pero una vez fundado, tuvo inicio una corriente de celos y envidias emanada de aquellos oficiales que vieron sus perspectivas de ascenso bloqueadas. Asimismo, la existencia del Colegio Militar significó una vinculación informal con los Colegios Nacionales, de los cuales procedía gran parte de su cuerpo docente, así como con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde recalaban muchos cadetes y jóvenes oficiales con aspiraciones de devenir ingenieros militares. Por el contrario, la negligencia en materia sanitaria reveló la mortal ausencia de los organismos públicos responsables de controlar la salud de la población.

Una vez alcanzada una institucionalización educativa de cariz meritocrático y cuando el orden burocrático-republicano intentó extenderse infructuosamente a escala nacional, comenzaron a multiplicarse los centros de gravedad, y a imponerse en la periferia fronteriza un orden predatorio, en el contexto de un modelo militar de connotaciones esquizofrénicas, pues era por un lado meritocrático, y por el otro simultáneamente burocrático-patrimonialista. Este modelo tuvo sus primeras armas en la esfera territorial y sus víctimas en el eslabón más débil consistente en las poblaciones originarias.

El orden oligárquico-predatorio fue necesario perpetuarlo mediante una fuerte presencia de diversos dispositivos, entre los cuales se destacaron la guardia nacional, las cajas militares de los cuerpos, el régimen del enganche, el mercadeo de grados y honores, y el comanditismo fraudulento en las proveedurías de los ejércitos, todos los cuales arrastraban fuertes cuotas de corrupción que --sumados a la corrupción generada por la participación en las intervenciones federales a las provincias-- terminaron por infectar la república aristocrática y desatar la pérdida de legitimidad política del grupo social dominante. El avance de un capitalismo competitivo es bloqueado y boicoteado por dicho comanditismo fraudulento, temeroso de ver peligrar su poder patrimonialista, beneficiando así a un capitalismo aventurero y predatorio. En medio de este clima corrompido se alzaba la Oficina de Enganche como el resabio paradigmático del orden patrimonialista y el chivo expiatorio con el cual ocultar el desmadre moral provocado con los certificados de tierras y con el nepotismo militar oligarquizante que habíamos analizado en los capítulos que siguen.

Así como la conquista del Chaco generó una expansión del espacio colonizado, también es cierto que dicha expansión tuvo una repercusión doble. Por un lado provocó en las comunidades originarias una interacción y una reciprocidad cada vez más intensa con colonos y empresarios obrajeros, la cual revelaba como estos últimos sacaban provecho de unos y otros, particularmente de los caciques, quienes los proveían de la mano de obra indígena jornalizada, y la garantía de una paz precaria a cambio de armas y vituallas. Y por el otro, gestó una poderosa fuerza gendarme o pretoriana, que habría de ser repetidamente utilizada en las intervenciones federales a las provincias vecinas, especialmente a la provincia de Corrientes.

El orden oligárquico-predatorio y el control de la diversidad de polos de poder no fue posible perpetuarlo sino mediante una fuerte presencia de diversos dispositivos, entre los cuales se destacaron aquellos vinculados con la impunidad de actos lesivos a la dignidad humana y ciudadana. Dichos dispositivos incluyeron: fueros especiales y el

amasijo del espíritu de cuerpo mediante instrumentos de endogamia corporativa, todos los cuales arrastraban fuertes cuotas de corrupción que terminaron por infectar la república aristocrática y desatar la pérdida de legitimidad política del grupo social dominante.

## **Sección IV-B.- Reacción cívica revolucionaria y dictadura tácita (1890-1905).**

Habiendo estudiado en la primera sección las tensiones de un complejo orden, simultánea y contradictoriamente meritocrático, predatorio y prebendario, esquizofrénicamente desatado en el frente interno militar, incluidas sus instituciones educativas, que derivaron en un orden burocrático-patrimonial oligárquico (1874-1890), nos dedicaremos ahora al estudio tanto de una política de reacción o resistencia cívica revolucionaria (popular y democrática) como de una estrategia de abstencionismo armado (1890-1905).

Esta política de reacción cívica, denominada en ese entonces con el equívoco apelativo de reaccionaria (que a partir de la última posguerra tiene un sentido opuesto), incluyó en su programa político nociones y reivindicaciones espirituales, morales y nacionalistas de recuperación de la dignidad ciudadana, que procedían del legado republicano, y que batallaban contra los regímenes pretorianos de origen bismarkiano.<sup>9184</sup> Es decir, a los derechos civiles alcanzados con la denominada Revolución de Independencia (1810-1822) se agregaron luego los derechos políticos ciudadanos, que fueron malversados o conculcados por los regímenes pretorianos, como también se repudiaron las tentaciones militaristas de los golpes o putschs, y se reivindicaron los principios de “regeneración” política de la romántica Generación de 1837 y su proyecto inconcluso de republicanización del estado (despatriarcalización, desestamentalización y despatrimonialización) y de emancipación nacional (Echeverría).<sup>9185</sup> Estas nociones nacionalistas eran todavía muy ajenas a la noción de liberación nacional y a la concepción de guerra de liberación, que fue propia de las culturas, teorías e imaginarios pos-nacionalistas que se resistieron a los militarismos colonialistas y a los ordenes neo-coloniales (Fanon, 1965).<sup>9186</sup>

En esta segunda sección, encaramos en tres capítulos el desarrollo histórico del conspiracionismo cívico-militar revolucionario; el anti-acuerdismo y la fractura militar; y el abstencionismo armado y las estrategias y tácticas insurreccionales, tanto del período del ejército de veteranos enganchados como del de los soldados conscriptos, surgido este último a partir de la Ley Riccheri (1902).

### **Capítulo IV-B-5-- Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario**

Índice del Capítulo IV-B-5

- E.- Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario.
  - E-I.- Descalificación denigrante de la revolución como motín o como golpe.
  - E-II.- Prensa de opinión y periodismo revolucionario.
  - E-III.- Conducción civil y militar de las Juntas Revolucionarias.
  - E-IV.- Naturaleza espontánea y popular de la Revolución del 90.
    - E-IV-a.- La participación de los Cadetes del Colegio Militar.
    - E-IV-b.- Incógnitas del Dilema ¿vencidos o vendidos?
  - E-V.- Conclusiones.

## **Palabras Claves**

Conducción civil y militar--Conspiracionismo cívico-militar revolucionario—  
Intervenciones provinciales--Juntas revolucionarias--Motín o Revolución--Periodismo  
revolucionario—reacción cívica--raccionario.

## **Keywords**

Civic reaction--revolutionary commitment--military leadership—reactionary--  
revolutionary committee--revolutionary journalism--

## **E.- Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario.**

La pérdida de legitimidad de la coalición política y generacional dominante --con la consabida erosión de los poderes carismáticos y de los lazos de camaradería y compadrazgo que habían sido enhebrados en las campañas guerreras (Paraguay, Desierto)-- y la crisis espiritual, política y económica, así como los concomitantes fenómenos conspirativos e insurreccionales que impregnaron la esfera de dominio militar, se apoderaron de las mentes y los corazones de los cuadros militares argentinos a partir de la revolución del 90, y perduraron durante veinte largos años, con alzas y bajas, hasta la misma consagración de la democracia ampliada, con la promulgación de la Ley Sáenz Peña (1912).<sup>9187</sup>

La Revolución del 90, y la crisis insurreccional cívico-militar orgánica que duró hasta 1893, así como la postrer Revolución de 1905, que equivocadamente se han mostrado por numerosos autores como meras tentativas golpistas (Rouquié, 1981, 13; y López, 1996), abrieron un extenso ciclo histórico que no solo dividió profundamente a sus elites militares, económicas e intelectuales sino que pusieron crudamente en tela de juicio el ideario “modernizador” de la Generación del 80 (poblar, educar y comunicar) así como las estructuras del orden y el estado oligárquicos, que contaba aún con fuertes elementos estamentales, predatorios y patrimonialistas.<sup>9188</sup>

La prédica político-filosófica en la esfera de dominio comunicacional (periodismo), que se expresó en la conjunción cívico-militar de los hechos revolucionarios, planteó cuestiones vinculadas con diferentes particularidades del proceso histórico, tales como la caracterización del evento cívico-militar como revolución y no con el denigrante apelativo de mero motín, putsch o chirinada; así como la dirección civil y no militar de los sucesos; y la indiferenciación entre revoluciones políticas y sociales.<sup>9189</sup> Desatados los fenómenos revolucionarios, se fueron combinando una serie de organismos tales

como la Juntas Revolucionarias de la Unión Cívica, las logias militares secretas, y los comités editoriales de la prensa revolucionaria.

Este quinto capítulo lo subdividiremos en cinco apartados, iniciando con la discusión acerca de la descalificación denigrante de la revolución como un mero motín o golpe; prosiguiendo con el rol cumplido por la prensa de opinión y por el periodismo como factores desencadenantes de la revolución; para luego tratar la conducción civil y militar de las Juntas Revolucionarias; y la naturaleza espontánea y popular de la revolución.

### **E-I.- Descalificación denigrante de la Revolución como motín o como golpe.**

La caracterización de acontecimientos traumáticos en la historia de la humanidad siempre ha ocasionado interminables polémicas periodísticas y debates jurídicos e historiográficos. Este fue el caso en la América Latina de la revolución de Independencia, y en Argentina en particular de la denominada Revolución del 90, de la crisis orgánica que le siguió hasta la revolución de 1893, y finalmente de la Revolución de 1905.<sup>9190</sup>

Para descalificar los acontecimientos revolucionarios, la prensa oficialista, las autoridades y los letrados e intelectuales sectariamente interesados acudieron a una batería de argumentos, desde la tergiversación de los hechos hasta la desvirtuación y ridiculización de los mismos.<sup>9191</sup> Para Rattenbach (1958), durante las conspiraciones como en oportunidad de las revoluciones, las bases jerárquicas de los ejércitos desaparecen, porque "...allí donde el general y el coronel deliberan de igual a igual con el capitán y el teniente, la jerarquía no puede existir y la disciplina se resiente profundamente".<sup>9192</sup>

A juicio de Yaro --seudónimo de un periodista del periódico *El Diario*, que bien podría tratarse también del mismo Diego Luis Lamas o de José M. Castro Sundblad-- el gobierno de Carlos Pellegrini (1890-1892) "...no ha sido justo", porque hizo pesar sobre los sectores del ejército que se alzaron en 1890 la calificación de "motineros".<sup>9193</sup> Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que se denomina motín y lo que es una revolución. El motín puede ser "...el resultado de cualquier tentativa conquistadora por parte de quien aspira al poder y no consigue alcanzarle por los medios legales apoyados en la voluntad pública".<sup>9194</sup> Con los motines se persigue "...la realización de propósitos exclusivamente personales, o por lo menos que no cifran su razón de ser en los intereses de todo el pueblo, de la colectividad como entidad moral, del estado como reproducción de la soberanía pública".<sup>9195</sup> Por el contrario, la revolución es "...la consecuencia lógica del progreso humano, que lucha por adelantar.- y no hallando en el campo de las leyes escritas suficiente amparo, busca en la conciencia popular, su base ideal, su justificativo jurídico, para esgrimir las armas y la fuerza bruta en nombre de una ley superior a todas las leyes, la ley de la existencia".<sup>9196</sup> Con las revoluciones "...se derriban o se minan las trincheras en que se guarecen los privilegios de los pocos, las usurpaciones.- los enemigos, en fin del adelanto nacional".<sup>9197</sup>

Para Yaro, el motín militar --castigado con la pena de muerte-- no ha existido, desde que la dirección del movimiento "...ha sido puramente civil, y las responsabilidades alcanzan a todo el pueblo argentino, porque el derrocamiento del Presidente Juárez era un deseo y una necesidad de la nación entera".<sup>9198</sup> La actitud del ejército insurrecto

estaba justificada para la opinión popular y para el criterio Napoleónico de la primacía de las fuerzas espirituales o morales, desde que el ejército "...no es una máquina creada para sostén de los opresores, sino al contrario una institución formada para garantía de las libertades, defensa del honor nacional y firme sostén de la Constitución y de las leyes".<sup>9199</sup> Si la tarea del Presidente Juárez era violar la ley y los preceptos constitucionales, como se sostenía estar suficientemente probado, "...¿podía ser extraño que el ejército argentino, por honor propio y honor del país, resolviera un día desligarse del mandón y devolver a los ciudadanos el uso de sus derechos y libertades? Lo contrario habría sido, sí, demostración palmaria de que el ejército argentino no tenía conciencia de su misión constitucional y de que se abatía, también, como **guardia suiza** bajo la corrupción de una época vergonzosa".<sup>9200</sup>

Si el movimiento de Julio del 90 hubiera sido sólo un cuartelazo o un motín militar mas, Yaro sostenía que el éxito "...habría sido inmediato, pues se hubiera procedido con celeridad y sin consideraciones, teniendo como único objetivo dominar en el primer momento de sorpresa y confusión aquello que se quería vencer y derrocar".<sup>9201</sup> Pero no fue así, pues la estrategia adoptada fue una puramente defensiva,<sup>9202</sup> y las tropas "...se pusieron espontáneamente al servicio del pueblo: libraron la dirección y el mandato a un grupo de hombres civiles, constituidos en gobierno provisorio, y cuando su actitud estaba así regularizada, recién entonces, obedeciendo órdenes, descargaron sus armas sobre los sostenedores de la situación [oficialismo], en duelo franco, ¡frente a frente!".<sup>9203</sup> Cuando, se preguntaba Yaro, "...y en que parte del mundo los motineros de cuartel han procedido de ese modo?....".<sup>9204</sup>

Por el contrario, para Yaro, lo que constituyó efectiva y propiamente un motín militar fue el evento que provocó la caída de Juárez Celman, acontecido con posterioridad a la capitulación del 29 de julio, una vez que ya había sido derrotada militarmente la revolución. La renuncia de Juárez, el 6 de agosto, para Yaro "...no fue un acto espontáneo: fue una imposición de sus colaboradores por intermedio del congreso y sobre la base de fuerza constituida por la fracción del ejército que acababa de combatir contra el 1º de artillería, el 5º, el 9º, el 10º, etc".<sup>9205</sup> El jefe más caracterizado de esta fracción militar le había dicho categóricamente al Presidente Juárez: "el ejército cumplirá con su deber combatiendo a la fuerza amotinada, pero se siente débil ante el pueblo armado".<sup>9206</sup> Y que significado tenía hacerle al Presidente dicha confesión, a la luz de la tan esgrimida disciplina militar, sino una suerte de chantaje o abdicación de los propios principios con que se combatió la rebelión, "...una declaratoria subversiva, un acto netamente revolucionario? Juárez, sin ejército, tuvo que ceder: no renunció, sino que fue depuesto por las mismas fuerzas triunfadoras".<sup>9207</sup> De manera que, bien examinada, la facción militar encabezada por el general Levalle "...no hizo sino terminar en la Plaza Victoria lo que la fracción encabezada por el general Campos había comenzado allá en el Parque".<sup>9208</sup>

La obediencia pasiva al Jefe del Estado había sido quebrada por igual y "...en ambos casos con sobrado motivo: no había sino esta diferencia: que Juárez no cedió ante los revolucionarios del Parque, porque ignoraba que la otra mitad del ejército también coincidía con aquellos en el deseo fundamental de eliminarlo a él".<sup>9209</sup> Y la conclusión lógica de esta aparente paradoja es: "...que todo el ejército ha sido revolucionario; y si ante la disciplina fue un delito la sublevación de los batallones disueltos, tiene que serlo también, la sublevación pasiva de los que impusieron la renuncia de Juárez".<sup>9210</sup>

La misma controversia se planteó quince años después, cuando se suscitó la conflagración cívico-militar de 1905, pues en el foro, en los cuarteles y en la prensa diaria se discutía si correspondía adjudicar la figura penal del motín o de la rebelión. Fue **La Prensa** quien más severamente se dedicó al tema, elaborando una doctrina favorable a su caracterización como rebelión.<sup>9211</sup>

## E-II.- Prensa de opinión y periodismo revolucionario.

La teoría política es conteste que para evadir el control político de un orden represivo, del tipo de un estado pretoriano así como el de un estado gendarme, policial o para-policial, es preciso implementar un modelo comunicativo y la vigencia de una teoría de la comunicación.<sup>9212</sup> La prensa de resistencia en la “Troya de América” (Montevideo) durante la campaña opositora contra la dictadura Rosista es un claro ejemplo de dicho modelo en su caso más extremo.<sup>9213</sup> Y el rol desplegado por Domingo F. Sarmiento como Boletínero del Ejército Grande (1852) es también otro testimonio combativo de una prensa revolucionaria.<sup>9214</sup> En ese sentido, a fines del siglo XIX, en un mundo carente de medios audiovisuales, la prensa de opinión vino a constituir el mecanismo más indicado para la circulación de noticias sobre la lucha política entablada, y su cadena distributiva vino a imitar el modelo de la creciente estructura tecnológico-comunicacional, ferroviaria y telegráfica.<sup>9215</sup>

A partir de la Revolución del 90 fue muy significativo el despertar de la actividad oficial y privada en el campo de la lucha periodística; actividad que parecía relegada en la sombra de las operaciones oscuras. Se descubre a partir de entonces el valor intrínseco de cada publicación, y la filiación personalista de cada uno de los nuevos órganos de prensa.<sup>9216</sup> Las teorías revolucionarias en boga en todo el país a fines del régimen de Juárez Celman eran divulgadas por la prensa diaria, especialmente por **La Argentina**, de la Unión Cívica (Saldías, Castellanos, de la Torre); por **El Diario**, de Manuel Láinez; por **El Municipio** (Rosario) de Deolindo Muñoz y su secretario de redacción Cipriano Benítez; por la pluma de Eleodoro Lobos primero y luego por el editorialista Adolfo E. Dávila desde **La Prensa**; por **La Libertad** de Pedro C. Molina (Córdoba), y por **La Política** (La Plata), de Alvaro Pinto.<sup>9217</sup>

La mayoría de los autores concuerdan que el rol de la prensa diaria fue determinante para el estallido de la revolución y también para el procesamiento del duelo que siguió a su derrota militar y para la larga lucha cívica que se prolongó durante dos largas décadas. Para Mendía (1890), el periódico que más contribuyó con la revolución fue **El Diario**, dirigido por Manuel Láinez, uno de cuyos periodistas murió en los cantones del Parque (Manuel Curutchet); y que en parte fue el vocero de la línea política representada por el ex Gobernador de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha.<sup>9218</sup> Sin embargo, quince años después, a propósito de la Revolución de 1905, la conducta de la gran prensa fue en gran medida adversa, o más bien fría, pues de resultados de la declaratoria de estado de sitio incurrieron en silencios y autocensuras, y como consecuencia del alza del movimiento obrero y la acción directa anarquista se habían derechizado.<sup>9219</sup>

En la oportunidad en que estalló en Buenos Aires la Revolución, el 26 de julio del 90, “...dejaron de aparecer los diarios nacionales: no era posible apreciar en esos momentos los sucesos sangrientos de que era teatro la capital, ni era posible dar circulación a los diarios, porque desaparecían todos los elementos indispensables para asegurar su

distribución”.<sup>9220</sup> La ciudad quedó así “...en las tinieblas. Condenada la población, por lo general, en el fondo de sus casas, sin diarios, sin correspondencia, sin mensajeros, no tenía medio alguno de información para apreciar la marcha de los acontecimientos y era juguete de las versiones más contradictorias y extravagantes que le llegaban a cada paso por los órganos más subalternos y que la mantenían, sin embargo, en una viva ansiedad y agitación”.<sup>9221</sup>

Por razones que fácilmente se deben apreciar, los “...diarios serios, órganos de la opinión nacional e independiente, se abstuvieron de dar boletines. No era posible que estas publicaciones, por fidedignas que fueren, llenasen el objeto que debían proponerse. Además, su distribución era un problema”.<sup>9222</sup> Sin embargo, “...algunos colegas extranjeros procedieron de otro modo, y *La Patria Italiana*, *El Correo Español* y algún otro publicaron boletines más o menos completos que, a pesar de su gran tiraje no tuvieron mayor circulación por las dificultades ya indicadas”.<sup>9223</sup> Otras imprentas lanzaron también boletines bajo títulos convencionales, imprimiéndose algunos de ellos en La Plata. Entre estos boletines “...merecen mencionarse por su extravagancia uno litografiado, con el título de *Boletín de la Revolución* y encabezado con un tosco grabado que representaba caprichosamente un supuesto asalto al cuartel del Retiro. Se dice que el cuadro fue tomado del natural”.<sup>9224</sup>

Pero no sólo la censura y la autocensura proliferaron durante los períodos en que se decretaba el estado de sitio. En muchos otros casos la represión se expresaba con denuncias de desacato por parte de autoridades oficiales.<sup>9225</sup> El caso más célebre ocurrió en la ciudad de Rosario, donde el Juez Dr. Estanislao Mouliá procesó por desacato al director de *El Municipio* Deolindo Muñoz. Dicho director apeló la medida en un extenso escrito dirigido a la Corte Suprema.<sup>9226</sup> También se dieron casos de flagrante tergiversación de las opiniones vertidas por diferentes líderes políticos. Ese fue el caso del Director de *La Prensa* Eleodoro Lobos, quien en marzo de 1891 tergiversó los dichos del Dr. Leandro Alem con motivo del Acuerdo firmado entre Roca y Mitre. Como la versión de estas palabras dada por *La Prensa* era completamente falsa, el Dr. Alem se apresuró a llamar la atención de su Director Eleodoro Lobos. Para cumplir lo prometido por *La Prensa*, el Dr. Alem no solo escribió un desmentido de lo dicho, sino las declaraciones políticas que creía pertinentes en estos momentos, y que, de su puño y letra, puso personalmente en manos del Director de *La Prensa*, doctor Eleodoro Lobos, quien anteriormente había puesto a su disposición las columnas de ese diario, a fin de que dijese lo que creyera oportuno.<sup>9227</sup>

En los comités de redacción, se practicaba asiduamente el género del denominado periodismo de opinión, y si bien muchos como el catedrático y letrado Francisco Barroetaveña firmaban sus artículos con nombre y apellido la mayoría de sus autores lo hacían con seudónimo. Entre ellos, los sesudos escritos publicados en el periódico *El Diario*, referidos a cuestiones militares y firmados con distintos seudónimos tales como Grapho, Ralf, Yaro, Justus, etc.<sup>9228</sup> Quienes firmaban con seudónimos tenían fuertes razones para hacerlo. Lamentablemente, los diferentes trabajos que revelan la identidad de los seudónimos de ese entonces, como los de Cutolo (1962) y los de Tesler (1991), ignoran los casos producidos en dichos periódicos. Para desentrañar su identidad, tuve que ir descartando posibles autores, tales como Nicolás Granada y Francisco Barroetaveña, hasta concluir que necesariamente debía tratarse de un militar o de un civil asesorado por un militar, que bien podría tratarse de Manuel Carlés o del mismo Láinez.<sup>9229</sup>

Entre los militares con dotes narrativas encontré a varios, entre ellos a José M. Castro Sundblad, Luis Yrurtia, el oriental Diego Lamas, Joaquín Castellanos, Antonio Tassi, Manuel Manrique, Pablo Solari, y Juan A. Cambiasso.<sup>9230</sup> Pero de todos ellos, quienes mas necesitaban firmar con seudónimo eran Lamas y Castro Sundblad, por estar ambos destinados en el Estado Mayor General del Ejército.<sup>9231</sup> Pero de tener que decidir entre estos dos últimos, me inclinaría por Lamas, precisamente por un triple motivo: ser Oriental, haber alcanzado el grado de Mayor en el Ejército Argentino, y presidir una Logia Militar secreta que desde el 18 de abril de 1890 venía aunando voluntades para producir la insurrección.<sup>9232</sup> Lamentablemente, a los efectos de practicar una compilación de sus escritos, la colección de *El Diario* en las hemerotecas Argentinas se halla trunca.<sup>9233</sup> Finalmente, luego de la revolución, y a partir de 1894, tiene su aparición un diario ejemplar, titulado *El Tiempo*, bajo la dirección de Carlos Vega Belgrano.<sup>9234</sup>

Lamas fue célebre no sólo por su actuación en la revolución del Parque, en Julio de 1890, sino por su posterior gesta revolucionaria en tierra Uruguaya en combinación con Aparicio Saravia (1897).<sup>9235</sup> Partió de Buenos Aires con veintidós (22) compatriotas entre los cuales estaban Luis Alberto Herrera, Carlos Roxlo y Florencio Sánchez, desembarcando en Puerto Sauce (Colonia) el 5 de mayo de 1897.<sup>9236</sup> De resultados de esta gesta, se acordó en La Cruz (Uruguay), en febrero de 1899, que la reforma electoral amplíe la democracia incorporando el principio de la representación de las minorías mediante el sistema de lista incompleta, antecedente inmediato de la Ley Sáenz Peña (1912) en Argentina, y de la representación proporcional en el Colegiado Uruguayo (1913).<sup>9237</sup>

### E-III.- Conducción civil y militar de las Juntas Revolucionarias

Para la época de la Revolución del 90, el profesionalismo militar que habían encarnado en Alemania Bismark y Moltke instauró una dicotomía entre la conducción civil y la militar.<sup>9238</sup> A semejanza de la Revolución del 90, la cual contó desde el 18 de abril de 1890 con una logia militar integrada por 33 oficiales, presidida por el oriental Mayor Diego Lamas, que designó una Junta Ejecutiva, un Tribunal de Honor, y un Jefe Militar, las revoluciones que la siguieron, entre ellas la Revolución de 1893, también contaron con una junta militar, subordinada a una junta civil.<sup>9239</sup> La dirección de la Unión Cívica Radical (UCR) en 1893, se componía de una junta civil y, adscrita a esta, una junta militar, encargada a juicio del Coronel Manuel J. Guerrero (6-3-A) de "...preparar la revolución".<sup>9240</sup> Pero ¿La Junta Revolucionaria debía estar compuesta por una Junta Civil y otra Junta Militar? ¿La Junta Militar debía estar subordinada a la Junta Civil o debía contar con autonomía propia? Estos eran algunos de los interrogantes más relevantes que diferentes dirigentes se hacían con asiduidad y se siguieron haciendo hasta fines del propio siglo XX.<sup>9241</sup>

La junta militar tenía "...entera autonomía en el desempeño de su misión. Por motivos de seguridad, esta Junta, resolvió centralizar los trabajos en una sola persona a fin de evitar las sospechas de la policía, que tenía la vista sobre nosotros".<sup>9242</sup> La elección recayó en el Mayor Manuel J. Guerrero, para los asuntos de ejército, y también para la organización combinada con la marina. En tales circunstancias, realizados los trabajos del caso y en situación de poder producir el movimiento general, Guerrero invitó "...a los miembros de la junta a una reunión especial para darles cuenta de la obra realizada y

de la organización adoptada para el movimiento. A esta reunión asistió, también, el Sr. General Don Teodoro García y el Diputado Nacional Don Pascual Beracochea, en representación del Sr. General Don Napoleón Uriburu, ausente en el asiento de su comando”.<sup>9243</sup>

Oído el informe y el plan general de la revolución por todos los presentes, fue aprobado en todas sus partes así como también en dos proposiciones fundamentales, que eran una réplica de las que se habían discutido en ocasión de la Revolución de Julio de 1890.<sup>9244</sup> La primera proposición hacía referencia a las eventuales retribuciones que podrían deparar los hechos revolucionarios, semejante también a la que se incluyó en el Manifiesto Revolucionario de 1905 (Caballero, 1961, 109), pues “...ninguno de los militares que participan en este movimiento tendrá recompensa especial en el caso de triunfar la revolución”.<sup>9245</sup> Si el Gobierno Provisorio de la hipotética revolución triunfante, en ejercicio del P. E. de la Nación, creyera “...conveniente decretar ascensos, estos se acordarán con sujeción a la Ley vigente, comprendiendo también a los militares que hubieren quedado al servicio del gobierno, en el concepto de que uno y otro han cumplido con su deber de acuerdo con su conciencia”.<sup>9246</sup> Con esta proposición, se quería ratificar el respeto a los criterios meritocráticos establecidos en la Ley de Ascensos (1882) y evitar así “...la desunión del ejército y mantener la disciplina con todo el vigor de su fuerza moral”.<sup>9247</sup>

Y la segunda proposición solicitaba la ampliación de la junta civil revolucionaria, que se componía de sólo tres personas --el Dr. Leandro N. Alem, el Dr. Juan M. Garro y el Sr. Juan Posse-- hasta llegar al número de once personas, tomando “...las que faltaban de una lista de ciudadanos caracterizados del Partido (que se confeccionó), las que con el título de Gobierno Provisorio, asumirían la responsabilidad de la revolución y presidirían- triunfante ésta la reorganización de la República de acuerdo con los principios proclamados”.<sup>9248</sup>

Aprobadas también por unanimidad estas proposiciones, se le encomendó con mandato imperativo al entonces Mayor Manuel J. Guerrero, para que gestionara de la junta civil su aprobación y cumplimiento previo.<sup>9249</sup> El mismo día, acompañado por el Mayor Francisco Antonio Vigo (5-7-I) y por el Alférez de Navío Hilario Ybarra, el Mayor Guerrero se presentó al Dr. Alem y “...le comuniqué la misión que llevaba. La primera proposición fue aceptada sin dificultad, no así la segunda, que dio origen a una seria discusión entre el Dr. Alem y el que firma, cediendo aparentemente, aquel”.<sup>9250</sup>

Esta divergencia de pensamientos entre el Dr. Alem y la Junta militar fue, a juicio del Coronel Guerrero, la que hizo “...fracasar esa revolución, cuya causa, oportunamente se explicará”.<sup>9251</sup> A diferencia de Alem, y sus correligionarios Barroetaveña y Del Valle, que participaban de una estrategia mixta entre lucha armada y oposición parlamentaria o concurrencismo, su sobrino Yrigoyen había cuestionado más fuertemente el Ministerio de Aristóbulo del Valle imponiendo a su estrategia una estricta e intransigente política de abstención revolucionaria.<sup>9252</sup>

Guerrero quiso dar estos precisos detalles para que “...se comprenda mejor el motivo de mi pedido de baja, íntimamente ligado a la primera proposición, pues, siendo su autor, era necesario afianzar con el ejemplo la sinceridad y el desinterés con que los militares concurríamos a este movimiento”.<sup>9253</sup> Este pedido de baja, era una actitud semejante a la discutida en los prolegómenos de la Revolución del 90, y a la adoptada por el Capitán

Franklin Rawson en la misma Revolución de 1893.<sup>9254</sup> Otra razón que tuvo el Mayor Guerrero para proceder de esa forma, fue la de que, "...no teniendo aspiraciones políticas, deseaba una vez terminada la acción revolucionaria, volver al ejército y continuar mi carrera, libre de todo prejuicio, dentro de los severos preceptos de las ordenanzas militares, que prescriben el ejemplo como el mejor sostenedor de la disciplina".<sup>9255</sup>

#### **E-IV.- Naturaleza espontánea y popular de la Revolución del 90.**

La Revolución de 1890, como bien lo señala Botana (1977), no consistió en un episodio tendiente a constituir una unidad política como lo fue la Revolución del 80, sino por el contrario, se hizo para impugnar la legitimidad de un régimen caracterizado como fraudulento y corrupto.<sup>9256</sup> Dicho fenómeno fue fruto de una coalición de fuerzas heterogéneas civiles y militares (liberales nacionalistas, católicos liberales, radicales, masones), donde los oficiales de las unidades militares con asiento en Buenos Aires tuvieron un rol decisivo pero subordinado a una conducción civil, y entre las cuales debe destacarse la labor política y militar cumplida por los integrantes del Colegio Militar.<sup>9257</sup>

La Revolución del 90 transcurrió en casi medio centenar de cantones o barricadas, que estuvieron repartidos en los cruces de esquinas de una extensa área de la ciudad de Buenos Aires, que contaba para ese entonces con medio millón de habitantes. Esa área cubría casi cien manzanas, enmarcada por las actuales avenida Córdoba al norte, y las calles Hipólito Irigoyen al sur, Junín al oeste, y Suipacha al este, estando el foco del aparato represivo al norte de dicha área, en la Plaza Libertad y el campanario de la Iglesia de Las Victorias, y el grueso de las fuerzas del gobierno acantonadas en El Retiro (centro ferroviario), adonde acudían los regimientos provenientes del interior del país.<sup>9258</sup> Las fuerzas de la represión también asistieron a la gestación de un movimiento envolvente formado también por cantones.<sup>9259</sup>

Una vez desatada la revolución, en forma sorpresiva, en la madrugada del 26 de julio, la gente que empezó a acudir al Parque de Artillería era cada vez más numerosa. La confusión provino en que "...desde el primer momento faltó el orden, base de toda disciplina y de todo movimiento militar, y se notó que faltaba una organización de estados mayores divisionarios".<sup>9260</sup> Sobre todo se cometió la equivocación, a juicio de *El Municipio* (Rosario), de "...dejar que la gente que solicitaba armas penetrase en el cuartel del Parque, donde, como es natural, antes de un cuarto de hora reinaba una confusión espantosa".<sup>9261</sup>

Fácil habría sido evitar este desorden, sin mas que "...ordenar que el pueblo se organizase por batallones en el inmenso ámbito de la plaza Lavalle y calles adyacentes, fuera del cuartel. Allí era fácil armarlos, municionarlos, darles jefes y oficiales, contarlos, etc., siquiera para saber de quien eran las responsabilidades de los sucesos y de los actos encargados a cada batallón y por consecuencia a cada jefe".<sup>9262</sup> Sin embargo no fue así, y nunca podrá saberse "...cuantos hombres tenía la revolución ni cuantos se habían armado: todo era un derroche de armas y municiones".<sup>9263</sup> Tomaba el mando de cada piquete de fuerza irregular "...el que quería o iba también donde quería; y piquetes había con dos o más comandantes que dictaban ordenes contradictorias produciéndose las escenas que son inevitables en esos casos".<sup>9264</sup> Cada piquete se

organizó “...por sí y ante sí, pero se organizó tomando posiciones inexpugnables en las azoteas y ventanas de todos los edificios que circundan la plaza del Parque, cuya construcción es excepcional en aquella región de la ciudad, compuesta todas de edificios de azotea y cornizas, a dos y tres pisos de altura”.<sup>9265</sup> De esta suerte, cada cantón “...tenía la doble ventaja de dominar un ámbito enorme de la población, colocándose sobre las posiciones enemigas, y además la de que la tropa se hallaba detrás de murallas naturales de cal y canto, a las que se agregó todavía centenares de bolsas de tierra, láminas de fierro, colchones y cuanto era posible”.<sup>9266</sup>

Acerca de que las posiciones y cantones todos de la revolución, eran inexpugnables; “...lo dicen los tres o cuatro ataques hechos durante el domingo, lunes y martes, ataques que sin producir un palmo de terreno de avance a favor de las tropas del gobierno solo les produjo enormes pérdidas, pues eran diezmadas de cien cantones a un tiempo, que no les permitían insistir mas de ocho minutos en cada ocasión”.<sup>9267</sup> Al cabo de tantos días de “...victorias parciales y sucesivas, en que los cantones se habían extendido increíblemente de sur a norte y de este a oeste de la capital, circuló la noticia de que las fuerzas del gobierno se retiraban porque se habían rendido a discreción”.<sup>9268</sup>

En el preciso cantón de Viamonte y Talcahuano, fallecieron cinco (5) de sus oficiales;<sup>9269</sup> otros cuatro (4) oficiales de un total de veinticinco fueron heridos,<sup>9270</sup> y otro se suicidó (Capitán Eloy Brignardello) cuando se lo obligó a hacer fuego sobre las tropas revolucionarias; siendo el resto purgados de las filas, dados de baja, y a fines de agosto fueron amnistiados y trasladados a distintos regimientos del interior del país.<sup>9271</sup> El armisticio había generado en dicha ocasión, entre la tropa revolucionaria, muchos de los cuales eran cadetes del Colegio Militar, un clima de decepción y frustración que, según Balestra (1935), los hacía contemplar el retorno a los cuarteles “...como una perspectiva de fusilamientos”.<sup>9272</sup> Con esta atmósfera el abismo entre la oficialidad superior y la subalterna se hizo más profundo.

#### **E-IV-a.- La participación de los Cadetes del Colegio Militar.**

La participación del Colegio en hechos políticos se remontaba a las revoluciones de 1874 y 1880.<sup>9273</sup> En la década del 80 los cadetes habían actuado en forma inconsulta, en un primer momento, durante un homenaje a Mitre acontecido en 1887; y en un segundo momento participando de uniforme en el acto público del Jardín Florida, acontecido en junio de 1889, que provocó su consabida expulsión.<sup>9274</sup> En un tercer y definitivo momento, en Julio de 1890, una treintena de Cadetes tomaron la Guardia de Prevención del Colegio para armarse e incorporarse a los regimientos revolucionarios.<sup>9275</sup> Un mes después del frustrado evento, aún quedaban nueve cadetes revolucionarios sin aparecer por el Colegio Militar.<sup>9276</sup> Y en un cuarto momento, en noviembre de 1890, con motivo de conmemorarse la Revolución, un cabo y trece (13) cadetes se fugan del Colegio para hacerse presentes en el Teatro Onrubia y recibir las medallas y los diplomas asignados en premio al valor demostrado en dicha revolución.<sup>9277</sup>

#### **E-IV-b.- Incógnitas del Dilema ¿vencidos o vendidos?**

Pero a raíz de los trágicos sucesos del Parque, en Julio del 90, diversos autores se plantearon las incógnitas del dilema: ¿fueron vencidos o fueron vendidos? La respuesta era, para Deolindo Muñoz, director de *El Municipio*, y para todo el pueblo, un verdadero enigma, “...era una duda la nuestra; enigma y duda que surgían de

consideraciones puramente militares, pareciéndose absurdos los fracasos de todas las operaciones bélicas indicadas en el plan revolucionario”.<sup>9278</sup> Las declaraciones de Mitre publicadas en la prensa parisiense y reproducidas en *La Nación* antes de la Convención del Rosario (Junio de 1891), fueron para Muñoz una revelación que “...nos lo explica todo”.<sup>9279</sup> Para Muñoz, Roca se había “...servido de la Guardia Vieja [el Mitrisismo]- y el ídolo del civismo [Mitre] había sido el instrumento ciego del enemigo público [Roca] en el derrocamiento de Juárez, debiendo serle también en el sentido de contrarrestar la acción del partido reaccionario [sinónimo de revolucionario], que amenazaba dar en la cárcel con todos los ladrones y todos los tiranuelos de la república”.<sup>9280</sup> Por eso el oficialismo “...permitió la Convención del Rosario, por eso se le halagó a Mitre, y por eso también en las inscripciones [para los comicios] se fusiló [reprimió] al pueblo, a fin de que la fuerza electoral del elemento reaccionario fuera nula, y la cohorte oficial siguiese siendo dueña del campo”.<sup>9281</sup>

Se preguntarán entonces, indaga Muñoz “...¿Por qué se inició entonces el acuerdo? La contestación está en los hechos mismos: se inutilizó a Mitre, haciéndole perder el apoyo de la opinión, segregándole por completo con sus idólatras y transformándole en satélite, después de haber sido un aliado de Roca”.<sup>9282</sup> Además, el Acuerdo dejó como secuela “...el desmembramiento cívico, lo cual no deja de ser una victoria para el aspirante a la dictadura [Roca]”.<sup>9283</sup>

## **E-V.- Conclusiones**

Como es de suponer, el orden político fundado en dispositivos tan vulnerables como los prebendarios y nepotistas tuvo necesariamente que degenerar en lo que se conoció luego como un orden burocrático-patrimonial oligárquico. Este orden oligárquico dio lugar a su vez a un clima conspirativo que fue fragmentando el espíritu de cuerpo o cohesión corporativa de uno de los pilares del esquizofrénico modelo político meritocrático-patrimonial-ilustrado, al extremo de desatar un proceso insurreccional de largo plazo e intensidad creciente, que de haber triunfado militarmente habría desatado un proceso de reformas económicas entre las cuales no se podía descartar –al menos en el pensamiento de Alem-- la redistribución de la tenencia de la tierra. En ese proceso insurreccional cívico-militar le cupo a la junta civil la dirección del frente militar, incorporando en su lucha a cuanta unidad militar se pronunciaba, incluidos los cadetes del Colegio Militar.

## **Capítulo IV-B-6 El Anti-Acuerdismo, la Fractura Militar y la “Dictadura anónima”.**

### **Índice del Capítulo IV-B-6**

F.- El Anti-Acuerdismo, la Fractura Militar y la “Dictadura anónima”.

F-I.- El Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular y democrática (1891).

F-II.-El Anti-acuerdismo en las cabeceras del interior (1891).

- F-II-a.- Sediciones de piquetes provinciales (Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes).
- F-III.- La crisis en el seno del oficialismo (1891)
- F-IV.- Agonía y crisis final del Acuerdo (1893).
- F-V.- Desarme oficial en las provincias (1893).
- F-VI.- Revolución desde abajo en las provincias (1893).
- F-VII.- Alzamiento de grupos de paisanos armados (1893).
- F-VIII.- Revolución desde arriba y el compromiso revolucionario del Ministro de Guerra (1893).
- F-IX.- Derivaciones político-militares del desarme y de las revoluciones desde abajo en las provincias.
- F-X.- El fracaso de la revolución desde arriba y el pretorianismo indirecto del Ministerio Quintana (1893).
- F-XI.- La “dictadura anónima” y los riesgos de la conjura (1896-98).
- F-XII.- Conclusiones.

### **Palabras Claves**

Acuerdismo—conspiracionismo anti-acuerdista—desarme oficial--sediciones de piquetes—pretorianismo parlamentario--revolución desde arriba—traición Mitrasta.

### **Keywords**

Conspirationism—Mitrasta treason—parliament praetorianism--revolutions from above--revolutions from below—

## **F.- El Anti-Acuerdismo y la Fractura Militar.**

Habiendo estudiado en el capítulo precedente la crisis del orden burocrático-patrimonial oligárquico desatada con la Revolución de 1890), nos toca ahora investigar la continuación de esa misma crisis aún irresuelta, que se manifestó en la secuela de conspiraciones y revoluciones que se dieron durante el transcurso de los años 1891, 1892 y 1893.

El solapamiento entre las esferas de dominio militar y político, que se expresó en la conjunción cívico-militar de los hechos revolucionarios, plantearon cuestiones vinculadas con diferentes particularidades del proceso histórico, tales como la proliferación de demandas sectoriales civiles y militares, y de alzamientos de orígenes regionales o provinciales. Desatados los alzamientos regionales, se fueron combinando una serie de niveles e instancias tales como los comités de partidos afines y los Piquetes Provinciales.

Se gestó así la formación de un anti-poder mediante una desigual combinación de la oposición parlamentaria consentida, entrampada en un pretorianismo parlamentario, y una abstención revolucionaria expresada en una prolongada secuencia de violentas réplicas o remezones, que se reprodujeron a lo largo de los años y las décadas siguientes.<sup>9284</sup> Algunas de dichas réplicas fueron tratadas en las obras de Etchepareborda

(1968) y de Alonso (2000), pero otras fueron totalmente ignoradas o desestimadas por la historiografía respectiva.

Asimismo, como los gobiernos de provincia tenían --contra toda la legislación y la constitución vigentes-- el excepcional privilegio de mantener batallones de milicias, una suerte de pretorianismo local, y esta prerrogativa no databa de uno, ni de dos meses atrás, sino de largo tiempo y a pesar de ello "...recién hoy los vemos alzarse en armas contra las autoridades", para el periodista Ralf, probable seudónimo de José M. Castro Sundblad o de Diego Luis Lamas, oriental célebre por su actuación en la revolución del Parque en Julio de 1890, debía necesariamente haber "...alguna causa oculta que determine estas manifestaciones anárquicas de la fuerza".<sup>9285</sup> Pero el periodista Ralf no creía equivocarse "...si --a manera de respuesta-- señalaba como culpable a los gobiernos mismos".<sup>9286</sup> Por el contrario, para los criterios represores y anti-cientificistas de *El Litoral* (órgano del autonomismo oficialista de Corrientes dirigido por Juan Ramón Vidal), la causa del motín sólo se debía "...a las teorías revolucionarias flotantes en todo el país".<sup>9287</sup>

Las políticas negociadoras conocidas como acuerdistas o pactistas, aplicables para la interpretación de este período, han sido analizadas por los cientistas políticos en las denominadas teorías de las coaliciones. Estas últimas fueron tratadas en sus numerosas combinaciones, tanto de la oposición como de los oficialismos.

Este sexto capítulo lo subdividiremos en diez apartados, iniciando la discusión con el Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular y democrática (1891); para seguir con el Anti-acuerdismo en las cabeceras del interior (1891), la crisis en el seno del oficialismo (1891), y la agonía y crisis final del Acuerdo (1893); continuar luego con el desarme oficial, la revolución desde abajo en las provincias y el alzamiento de paisanos armados, así como con el Ministro de Guerra y la revolución desde arriba (1893); con las derivaciones políticas del desarme y de las revoluciones en las provincias, con el fracaso de la revolución desde arriba y el pretorianismo indirecto del Ministerio Quintana (1893), y culminar con el camino de la dictadura y los riesgos de la conjura durante el bienio 1896-97.

#### **F-I.- El Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular y democrática (1891).**

Por política acuerdista se entiende aquella transición motorizada mediante arreglos de cúpula, casi siempre producto de coaliciones formadas entre miembros de la elite político-militar, sin participación alguna de los sectores intermedios y populares. Ahora bien, estas coaliciones no eran eternas y muy a menudo se quebraban de formas muy diversas. Una de esas formas de fracturar la coalición opositora era trabando alianza con la fracción más reformista de la coalición oficialista.<sup>9288</sup>

De aquí que, cuando la transición política es intentada por la coalición opositora (Mitristas, Radicales, Católicos, Masones), como fue el caso en la Revolución del 90, la ofensiva le correspondió a los sectores radicalizados de dicha coalición (Radicales).<sup>9289</sup> Pero como la derrota militar de estos últimos engendró un proceso de deslegitimación del Radicalismo, por mostrarse como un partido anti-sistema, le abrió las puertas del juego político a las facciones reformistas de ambas coaliciones, tanto de la oficialista (Pellegrini) como de la

opositora (Mitre), que se concretó en un pacto explícito celebrado entre las mismas en 1891 (Acuerdo Roca-Mitre).

Si bien el Acuerdo Roca-Mitre configuró una situación de cooperación explícita entre ambos actores que fue funcional para controlar la incertidumbre que generaba la reincorporación al ruedo político de una facción político-militar que había participado de la Revolución del 90, como lo era el Mitrismo, y para fortalecer alrededor de Roca la asimetría necesaria para imponer su hegemonía, no lo fue así para la incorporación del Radicalismo y la consolidación de las instituciones democráticas (limpieza del sufragio o sufragio secreto y obligatorio).<sup>9290</sup>

Es así que, cuando el nuevo régimen nacido de la renuncia de Juárez Celman empezó a poner de manifiesto "...cuales eran sus intenciones y sus conveniencias, cuando los hechos empezaron a demostrar que no había modificación ninguna en el gobierno y todo se reducía a un cambio de regentes en la sociedad explotadora que nos oprime, cuando, en fin el Dr. Pellegrini declaró abiertamente que el gobierno actual era el resultado de una simple evolución del partido imperante, la opinión pública perdió todas las ilusiones y comprendió que la caída de Juárez no constituía un triunfo de la revolución, sino que era el éxito final de una maquinación sigilosa, de la que los revolucionarios y la Unión Cívica habían sido las víctimas".<sup>9291</sup>

Un numeroso conjunto de hechos, entre ellos: la conducta del General Roca (cuya estrategia militar estaba inspirada en el General Moltke), las declaraciones del General Mitre, las complacencias del Mitrismo conservador para con el oficialismo Roqui-Pellegrinista, "...confirmaban las sospechas de que existiese algún misterio en el fracaso de la revolución; misterio que los jefes debían aclarar contestando a la opinión pública, la cual seguía planteando el dilema: ¿vencidos o vendidos?".<sup>9292</sup> Las publicaciones del Dr. Alem y del Gral. Campos aparecieron "...como una contestación a la pregunta del pueblo; pero lejos de abordar directamente el dilema se limitan a declararse uno a otro responsable del fracaso, admitiendo sin discusión que la revolución fue vencida y no vendida".<sup>9293</sup>

El Dr. Alem atribuyó la derrota "...al hecho de no haberse llevado inmediatamente el ataque a las fuerzas del gobierno, error cuya responsabilidad atribuye al Gral. Campos".<sup>9294</sup> Éste, a su vez, declara que "...en el momento de tomar el mando no conocía las modificaciones introducidas por la Junta Revolucionaria en el plan de guerra, y que además el Dr. Alem no había tomado las disposiciones necesarias a fin de que los enemigos fueran privados de sus jefes y la escuadra abriese fuego contra el cuartel del Retiro y la Casa Rosada".<sup>9295</sup>

Las desavenencias políticas en el seno de la Unión Cívica, iniciadas antes de los sucesos de Julio, y fomentadas después de la caída de Juárez, estallaron con la polémica entre Alem y Campos, cuyas discrepancias "...relativas al fracaso de la revolución sirven de pretexto a una lucha fratricida, en la que el Gral. Roca aparece como el instigador oculto y los dos jefes son las víctimas, quizás inconsulta de una maquinación oculta, urdida entre la guardia vieja [Mitrismo] y el cuñado de Juárez [Roca]".<sup>9296</sup>

Otros hechos contribuyeron a arrojar algo de luz en las tinieblas de la crisis. Los ataques del general Manuel J. Campos, las combinaciones electorales habidas en la provincia de Buenos Aires, la devolución del grado de general y el uniforme a Mitre (del cual había

sido despojado en oportunidad de la sublevación de La Verde, ocurrida en 1874), la permanencia de los mitristas *pur sang* en el gabinete (Juan Carballido, Eduardo Costa), “...aún después de los escándalos y de los fusilamientos en las provincias, todo en fin, concurría a probar que entre la guardia vieja y el oficialismo existían pactos secretos, anteriores a la revolución de julio, según los cuales la supresión de la lucha [electoral], proclamada hoy por el candidato cívico [Mitre], estaba acordada de antemano, con el propósito de salvar a los defraudadores del erario, asegurándoles la inmunidad y la invulnerabilidad contra los esfuerzos de una oposición formidable”.<sup>9297</sup>

En tales maquinaciones, el doctor Alem y la juventud cívica, “...figuraban como víctimas del mitrismo, no ya como cómplices, -y la conciencia pública, adversa a toda transacción, recogía las voces de acuerdo con el oficialismo en un sentido diferente del que los traidores querían darles, haciendo de la alianza entre Roca y Mitre una solución nacional en la que Mitre jugaba el rol de apoderado de la Unión Cívica”.<sup>9298</sup> El pueblo veía en todo aquello “...una mistificación, un atentado a la libertad del sufragio, a la dignidad individual, sin que llegar hasta formular una acusación directa contra el presidente del partido reaccionario [o revolucionario], ni contra el elemento joven, patriota y desinteresado”.<sup>9299</sup>

Sin embargo, cuando los pactos secretos empezaron a ser públicos y a hacerse efectivos, sin que el Comité de la Unión Cívica opusiera su veto, “...cuando en las elecciones de senadores por la capital federal vióse al oficialismo acordar toda clase de protecciones a las candidaturas de los doctores Alem y del Valle; cuando, en fin, el egoísmo porteño pareció infiltrarse en el partido de la regeneración nacional, imponiendo a este el silencio, mientras las provincias estaban, como están todavía, entregadas a la cruel tiranía del caudillaje; desapareció entonces del corazón del pueblo la confianza en los prohombres del civismo, y la inocencia de ellos, su buena fé, empañáronse por las dudas que justamente inspiraban el silencio y la inactividad en presencia de tantas felonías”.<sup>9300</sup>

Por cierto, la elecciones que llevaron a Alem y del Valle al Parlamento, no fueron “...un triunfo de la libertad electoral: acordada sin petición directa, pero previamente calculada en los secretos conciliábulos donde se preparó la supresión de la lucha”.<sup>9301</sup> Si Roca “...no hubiese querido, ni del Valle ni Alem estarían en el senado, y si la elección de ellos no hubiera sido conceptuada por los jefes del naciente unicato roque-mitrista como un medio favorable para engañar al público, la Unión Cívica no hubiera tenido la fuerza moral ni la organización necesaria para imponer sus candidatos”.<sup>9302</sup>

Tampoco, la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen, postulada por un sector cívico, colmaba las aspiraciones del pueblo.<sup>9303</sup> A juicio de Deolindo Muñoz, director de *El Municipio* (Rosario), “...no se trata hoy de una lucha electoral, sino de una lucha armada, en el sentido más amplio de la palabra. Un cambio radical del sistema político-administrativo, el aniquilamiento de un gremio zángano el cual ha destruido los frutos del trabajo colectivo, la encarcelación de una gavilla numerosa, que hoy está en el poder y mañana deberá llevarse a la penitenciaría: eso es lo que buscamos todos los buenos y eso no puede ser el resultado de una simple elección presidencial, sino de una contienda violenta”.<sup>9304</sup>

## F-II.- El Anti-acuerdismo en el interior del país (1891).

A poco andar el recambio de gobierno producido como resultado de la Revolución del Parque (Juárez Celman renunció el 6 de agosto de 1890), y a pesar de la Ley de Amnistía (26-VIII-1890) y del Decreto de Reincorporación de los jefes y oficiales revolucionarios (1-IX-1890), el país cayó, al decir del periodista Ralf, de la redacción del que fuera órgano de prensa del juarismo, el diario *Sud-América*, "...en el viejo círculo de los abusos y vejámenes tan brevemente criticados y deplorados".<sup>9305</sup> Hubo una enorme decepción, "...tan inmensa como lo fue el optimismo que la precediera. Las elecciones de diputados en Mendoza, la del gobernador Gustavo Ferrari en Catamarca y otros hechos análogos decían bien a las claras que se había cambiado la etiqueta al frasco pero que la droga seguía siendo tan venenosa, tan mortífera como antes".<sup>9306</sup> Los comicios --que en aquel tiempo por no existir padrones los votantes debían previamente inscribirse-- "...guardados por fuerzas de línea y las falanges oficiales haciendo simulacros de elecciones; he aquí el espectáculo que ha ofrecido nuestra vida democrática en los últimos tiempos, matizado eso con las protestas hipócritas de los que mandan".<sup>9307</sup>

El mismo lúcido como ignorado periodista que firma en *Sud-América* con el seudónimo de Ralf, manifestaba en 1891, que "...cuando estalló el movimiento subversivo de Catamarca [23-VI-1891] se dijo que es la sublevación de un **piquete de soldados**, cuando sucedió otro tanto en Santiago [28-VI-1891], repitióse la misma frase, y ahora la oímos por tercera vez [20-VII-1891], aplicada a un suceso de idénticas apariencias [ocurrido en Corrientes]".<sup>9308</sup> Pero para la sorprendida pero no ingenua mirada del anónimo periodista que firma con el seudónimo de Ralf, era muy raro que tres (3) provincias hayan sido simultáneamente convulsionadas "...sin que existan circunstancias muy especiales que expliquen ese fenómeno extraordinario".<sup>9309</sup> Para el caso de Corrientes, el culpable era el gobierno de Antonio Ruiz (primo del Senador Juan Ramón Vidal), que con sus abusos llegó a provocar en enero de 1891 la emigración de un pueblo entero (Santo Tomé) a San Borja (Brasil), y de más de dos mil ciudadanos procedentes de varios otros pueblos (Empedrado, Bella Vista, Lomas, San Luis, San Cosme, Santa Ana, Iratí, Caátí, Ituzaingo, Alvear y La Cruz), que emigraron al Chaco, al Paraguay y a otros pueblos de Brasil.<sup>9310</sup>

### F-II-a.- Sediciones de Piquetes Provinciales (Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes).

En la ciudad de Buenos Aires se calculó que había una decena de miles de desocupados.<sup>9311</sup> En medio de ese clima social, la oposición de la Unión Cívica --por intermedio de Francisco Barroetaveña-- propuso a fines de agosto de 1890 la realización de un Meeting Nacional para lograr el repudio a la presencia --en el gabinete del Presidente Pellegrini-- de los ministros del Interior y de Guerra, Generales Roca y Levalle.<sup>9312</sup> Entrado el año 1891, con motivo del atentado contra el Ministro del Interior (Julio A. Roca), cometido por un muchacho de doce años (Tomás Sambrice), el 20 de febrero de 1891, el Presidente Pellegrini decretó el estado de sitio en la Capital, censurando y clausurando publicaciones.

Y en el interior, reinaba también la mayor de las incertidumbres. En Córdoba, el 21 de mayo de 1891 estalló una asonada dirigida por el Comandante Tomás Bello, secundado

por numerosos oficiales subalternos, todos los cuales fueron ex combatientes el año anterior en la denominada Revolución del Parque.<sup>9313</sup> La asonada fue acompañada civilmente por un comité formado por prestigiosos políticos opositores (Pedro C. Molina, Juan M. Garro, Laureano Pizarro, Deodoro Roca [padre], y Manuel Vidal Peña).<sup>9314</sup> El gobierno nacional mediante el Regimiento 10 de Infantería de Línea y su Comandante Coronel Pedro Toscano reprimió la intentona.<sup>9315</sup> Esta última se inició con el descubrimiento de un túnel excavado con el objetivo de alcanzar el Cabildo construido por un Ingeniero Militar Belga "...para desde allí hacer fuego y arrojar bombas explosivas y en último caso aplicar dinamita para destruir parte del edificio".<sup>9316</sup> Dicha represión siguió con un allanamiento en la casa de Eudoro Roca (tío carnal de Deodoro Roca [hijo], numen de la Reforma Universitaria de 1918), donde se registró un tiroteo que duró doce horas.<sup>9317</sup> Con motivo de dicho tiroteo y de los allanamientos que le siguieron produjéronse varios centenares de presos políticos, un centenar de heridos y una veintena de muertos, entre ellos Eulogio Funes, Ignacio Ovejero, Gabriel Castillo, Rafael Peña, Avelino Toledo, Segundino Fernández, Marcelino Boso, y Ceferino Martínez.<sup>9318</sup>

No obstante la intensidad de la violencia registrada en Córdoba, la interpretación de estos hechos por el periodismo crítico de entonces no era unánime. Para Sam, el seudónimo de un periodista de *El Diario*, llamar revolución a lo que pasó allí "...sería querer engañarse a sabiendas. Alzamiento no es tampoco, ni menos motín, rebelión, asalto, o cualquier otro de los términos corrientes. Las noticias recibidas, de origen oficial en su mayor parte, inducen a mantenernos prudentemente en lo indefinido: lo de Córdoba".<sup>9319</sup> Lo de Córdoba, significa bien claramente para el periodista Sam, que "...la libertad en un país, como el agua en las vasijas que la contiene, busca su nivel, y no es posible que, mientras en la capital de la República, bajo el gobierno federal, los ciudadanos gocen de todos los derechos y garantías acordados por la constitución, en las provincias han de continuar privados de ellos, sin voz ni voto, sin opinión ni acción, simples testigos presenciales de los malos gobiernos y obligados a tolerarlos bajo la presión de las fuerzas oficiales".<sup>9320</sup>

En vista de la crítica situación provocada por los sucesos acontecidos en Córdoba, el 7 de junio de 1891, el Comité Nacional de la Unión Cívica designa una comisión de tres políticos mitristas y tres intransigentes para elaborar un "acuerdo" con el Partido Autonomista Nacional (PAN), que se firma el 12 de junio. Dicha política, no había sido en realidad sino una tregua y un recurso electoral, pues "...no fue una política con ideales reparadores honrados y sinceros: fue una liga de fuerzas eleccionarias, conservando su naturaleza espúrea, que se emplearon para hacer prevalecer el pacto con fraude notorio al derecho electoral".<sup>9321</sup> Esta tregua política entre dos viejas fuerzas, el Autonomismo y el Liberalismo Nacional (Mitrismo), dio lugar al indignado nacimiento de una tercera fuerza, la Unión Cívica, cuyas autoridades rechazaron lo acordado, que con el transcurso del tiempo y de la lucha se fue constituyendo para el oficialismo en el denominado enemigo interno, del que hablamos en otro capítulo de este trabajo. El "acuerdo" estaba muerto pero, también, la hasta entonces coalición opositora.

A fines de junio de 1891, y ya comprometido el Acuerdo Roca-Mitre, se produjeron nuevos alzamientos y los amotinados tuvieron en Catamarca el 23 de junio un éxito sangriento, al extremo que se debió intervenir la provincia y declarar en ella el estado de sitio.<sup>9322</sup> En Catamarca, la causa motor del estallido fue que los principales líderes de la Unión Cívica se hallaban detenidos (Oscar Liliedal, Guillermo Leguizamón, Carlos de

la Vega, Angel Maza).<sup>9323</sup> Con las comunicaciones telegráficas interrumpidas el Gobernador Ferrari no pudo solicitar la intervención del Gobierno Nacional. Sin embargo, sin solicitud alguna el gobierno federal envió al General Amaro Arias (hermano del General José Inocencio Arias) quien repuso al Gobernador Ferrari en el mando. Esta situación dio lugar a que un periodista bajo el seudónimo de Rubén Marco, manifestara en *El Diario* que "...cuando el Congreso dijo que se repusiera al gobierno de Catamarca, quiso significarle que se debía reponer al gobernador legal, al que hubiera obtenido los sufragios del pueblo y al que estuviera en las condiciones que exige la constitución catamarqueña para desempeñar ese puesto".<sup>9324</sup> Y para otro periodista bajo el seudónimo de Halpf, los miembros de la Unión Cívica "...han recibido orden de no hablar mal de las autoridades y este último rasgo de insolencia autoritaria, demuestra hasta donde llega el abuso del poder en aquella infeliz provincia".<sup>9325</sup>

Cinco días después, el 28 de Junio de 1891, en Santiago del Estero, el piquete de policía que estaba de guardia, encabezado por un teniente de guardias nacionales llamado Tolosa, que estaba detenido, abandonó la Jefatura de Policía en completa formación y dirigiéndose a la casa del Gobernador Maximio Ruiz lo redujo a prisión, haciendo otro tanto con el jefe de Policía Mayor Cardoso, el Vice-Gobernador Manuel Beltrán y varios diputados insospechablemente Rojistas, seguidores del Senador Absalón Rojas, proclamando enseguida gobernador provisorio al Senador Provincial Pedro García, quien fuera posteriormente asesinado.<sup>9326</sup> Tanto Beltrán como varios diputados llegaron a Santiago desde Buenos Aires, acompañados por un Piquete compuesto por medio centenar de soldados de Línea, enviado por el Presidente de la República, pero que no había sido autorizado por el Congreso.<sup>9327</sup>

Y un mes más tarde, el lunes 20 de julio de 1891, en Corrientes, la situación de guerra civil volvió a estallar, con el desdoblamiento del batallón provincial, entre dos fuerzas antagónicas. El batallón leal estaba puntualmente pago pero al Batallón "Corrientes", como así se lo conocía al batallón de guardia-cárceles, se le adeudaban numerosos meses, lo que finalmente provocó su sangriento alzamiento. Este último estaba liderado por un joven de 25 años, ex liberal, llamado Servando Godoy; que al dar muerte al Mayor Alegre, al Capitán Julián Godoy, y al Coronel Robustiano Vera, ex Jordanista, obligó al Jefe de la Guarnición del Chaco Austral General Antonio Dónovan --enterado por vía telegráfica-- a actuar de motu propio con el regimiento 6 de Línea.<sup>9328</sup> Para *El Censor*, se trataba de una intervención nacional de hecho, sin acuerdo del Congreso. Al periodista de *El Censor* le llamaba poderosamente la atención que las autoridades Correntinas se hayan creído "...con la facultad de mover fuerzas de línea, que la Constitución ha reservado al Presidente de la República, y que el General Dónovan haya reconocido ese derecho, procediendo a trasladarse sin orden del Gobierno al campo de los sucesos".<sup>9329</sup>

Mientras tanto, se sucedían numerosos arrestos de militares sospechados de insurrectos. Al poco tiempo de estar destinado el Mayor Amador Molina al Batallón 12 de Infantería, sito en Catamarca, en 1891, se le ordenó marchar a Zárate para asistir a las maniobras del Talar de Pacheco. Pero al marchar el Batallón a Zárate, Molina declaró que "...quedé en Catamarca con [un Destacamento de] cincuenta hombres a órdenes del Gobernador de la Provincia".<sup>9330</sup> Como a los quince días de haberse marchado el Batallón, y estando Molina en la Plaza, acertó a pasar por ahí el Dr. Guillermo Leguizamón, "...con quien me ligaba estrecha amistad de mucho tiempo, y se puso un

momento a conversar conmigo, y un momento después me dijo “me voy amigo porque si lo ven conmigo está de cólera”.<sup>9331</sup> Y aparentemente el alegado contagio se concretó, pues el Mayor Molina relata que “...yo no se quién me vio que al otro día recibí un telegrama ordenándome entregara el Destacamento al Teniente Pedro León Cáceres, y me presentara al Batallón en Zárate”.<sup>9332</sup> Cuando Molina se presentó, “...pasé preso e incomunicado, se levantó una prevención sumaria, pero como no pudo comprobarse nada a los doce días fui puesto en libertad”.<sup>9333</sup>

### F-III.- La Crisis en el seno del oficialismo (1891)

A fines del mes de junio de 1891, en Buenos Aires, los mitristas fundaron la Unión Cívica Nacional (UCN); un mes más tarde, en Julio, los antiacuerdistas constituyeron la Unión Cívica Radical (UCR); y el 23 de julio Alem pronunció en el Senado un célebre discurso donde denunciaba los abusos y atentados de lo que hoy conoceríamos como un balance crítico del estado de los derechos humanos.

La guerra civil era prácticamente un hecho. Había en todo el país un total de casi un centenar de detenidos, algunos de ellos presos en Catamarca, en Buenos Aires, en el Batallón 3º de Artillería de Zárate y en el Regimiento 11 de Línea en Tucumán.<sup>9334</sup> En Zárate, fueron reducidos a prisión “...algunos oficiales del Batallón 5º y del 9 de Infantería por sospechosos de revolucionarios”.<sup>9335</sup> Todos estos oficiales jefes fueron conducidos al monitor **Los Andes** anclado en el puerto de Zárate (comandado por el Capitán de Fragata Emilio Casavega). Según lo relata uno de ellos, el Mayor Amador Molina, cuando fue puesto en libertad “...me hice cargo de la Mayoría del Batallón como Capitán más antiguo por ausencia del Mayor 2º Jefe del Cuerpo D. Alberto Cáceres (hoy General)”.<sup>9336</sup> Después de las maniobras “...marchamos a Buenos Aires y nos instalamos en Palermo, donde hoy está la Sociedad Rural, de allí pasamos a Santa Catalina (actual Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires) a formar parte de la División Palacios, todo esto en el año 91 y primeros meses del 92”.<sup>9337</sup>

Entre agosto y octubre las filas oficialistas entran en crisis. En agosto, Roca renuncia a la jefatura del Partido Autonomista, y en octubre de 1891 Mitre renuncia a su candidatura presidencial.<sup>9338</sup> Pero si bien Mitre renunció a la candidatura, no lo hizo así respecto al Acuerdo.<sup>9339</sup> Viceversa, **La Nación** declara “...roto el acuerdo sin perjuicio de que los portavoces del mitrismo insisten en celebrar conferencias con el objeto de arribar a una nueva solución, sobre la base de la candidatura Mitre”.<sup>9340</sup> Mitre rompió el pacto, pero sus elementos “...empezaron a abandonarle, de modo que en el segundo acuerdo entró con un patrimonio político muy reducido; -tan reducido que en las últimas elecciones debió apelar al fraude y al apoyo de la policía, para sostenerse allá mismo, donde un año antes no tenía adversarios.”<sup>9341</sup>

Mientras tanto, el deliberacionismo en el seno de un oficialismo acéfalo (P.A.N.) dio lugar en diciembre de 1891, a que el gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa propusiera la candidatura de Roque Sáenz Peña, dando forma a la facción Modernista del P.A.N., y el 15 de febrero de 1892 se proclamara la fórmula Sáenz Peña-Pizarro.<sup>9342</sup> Cuatro días después, el presidente Pellegrini postuló la candidatura de Luis Sáenz Peña, un político de filiación católica, provocando la inmediata renuncia de su hijo Roque a la Presidencia.<sup>9343</sup> Esta artera artimaña de Roca –que tuvo su antecedente en 1886 en las candidaturas de Manuel Ocampo padre e hijo-- dio lugar a que se comenzara a

bosquejar una eventual coalición entre Radicales y Modernistas y a que se debilitara aún más su liderazgo en el ejército.<sup>9344</sup>

Las encontradas ambiciones de Mitre y de Roca, obraron "...como fuerzas iguales y contrarias que se neutralizan, produciendo como resultado la candidatura [Luis] Sáenz Peña, un quid intermedio entre la reacción [o revolución] y el conservadorismo, -esto es, abrieron sin quererlo al pueblo el camino de la agitación legal y de las reivindicaciones pacíficas".<sup>9345</sup> En medio de esta puja, la política de Roca, fue al parecer de Deolindo Muñoz, una deliberada "...política de eliminación; esto es, ha eliminado e inutilizado sucesivamente todas las personalidades que podían aspirar al cargo supremo, ridiculizando a unos, haciendo cometer todas clase de errores a otros, obligándolos a todos a recibir desaires de sus propios amigos y a despertar resistencias que les cierran el camino del poder".<sup>9346</sup> Desde su mismo arribo de Europa, Roca empezó a "...reorganizar sus elementos, valiéndose de todos y de todo, inclusive la simpleza de los adversarios y la criminalidad de los favoritos; preparó a su gusto el terreno, dirigió según su conveniencia la misma revolución de julio, se aseguró la adhesión del ejército y de la liga de gobernador, y en pocos meses de ministerio rehizo su patrimonio electoral, aniquilado casi, durante la presidencia de Juárez".<sup>9347</sup>

Como consecuencia de la agitación desatada por las sucesivas renunciadas de Mitre y de Roca, el 2 de abril de 1892, se decretó el estado de sitio en todo el país (que duró tres meses), todo ello un par de meses antes de reunirse el Colegio Electoral, que con la abstención del radicalismo consagró la fórmula presidencial del Acuerdo (Sáenz Peña-Uriburu).<sup>9348</sup> Y a fines de septiembre de 1892, y como corolario de la agitación civil, estalló la conspiración en el Campamento de Santa Catalina --un archipiélago integrado con regimientos de diferentes armas-- que a la postre resultó traicionada por las delaciones de los oficiales Eduardo Gallino y José Zorzano.<sup>9349</sup> Para la editorial del diario *La Prensa*, si realmente hubo una conjuración "...como lo expresan las medidas extremas tomadas, y la caracterizan los datos incompletos que han trascendido en el publico, resultaría probado que las tropas regulares de la Nación están conmovidas".<sup>9350</sup> Y si el complot no hubiese existido, o si sus proporciones hubiesen sido menores que las que la crónica esboza, "...resultaría siempre la misma conclusión, porque las prisiones revelarían la desconfianza que a los superiores inspira una parte de las fuerzas de línea --no importa que fuese ella grande o pequeña".<sup>9351</sup>

#### F-IV.- Agonía y crisis final del Acuerdo (1893).

Pero una vez que se inició el mandato presidencial de Luis Sáenz Peña, la crisis no dejó de sobresaltar a la opinión pública. En los ocho meses desde que comenzó el mandato del Presidente Luis Sáenz Peña, en octubre de 1892, se produjeron siete crisis de gabinete; y tres en un mes. Para *El Municipio* (Rosario), el mandato de Sáenz Peña transcurrió "...casi a crisis por mes, dándose el caso que a poco mas de la mitad del tiempo, habían desertado o fueron despedidos todos los hombres que inauguraron la situación actual".<sup>9352</sup>

La infausta serie de fracasos ministeriales la inició el doctor Manuel Quintana en la cartera del Interior, quien renunció por considerar que al gabinete le faltaba homogeneidad, siendo la piedra del escándalo la Intervención a Santiago del Estero.<sup>9353</sup> Le sigue en orden cronológico el Dr. Antonio Bermejo cuya entrada en el Ministerio del

Interior creyóse segura, pero que los sucesos de Corrientes de enero de 1893 terminan por frustrar.<sup>9354</sup> A continuación, en el primer semestre de 1893, asume la cartera Wenceslao Escalante, de neto corte Roquista, conjuntamente con el doctor Calixto de la Torre desde la cartera de Instrucción Pública y Justicia, el canciller Dr. Tomás S. Anchorena, el general Benjamín Victorica en el Ministerio de Guerra, y el doctor Juan J. Romero en Hacienda. Todos estos ministros "...pertenecen al número de los arrojados por la ventana de la casa rosada a donde entraron por la puerta".<sup>9355</sup> Y, finalmente, le tocó el turno a Miguel Cané,<sup>9356</sup> quien dura sólo una semana, desde el 27 de junio al 5 de julio, conjuntamente con el Doctor Alcorta y el general Joaquín Viejobueno, "...este último a los diecinueve días de tomar posesión del ministerio de guerra y marina".<sup>9357</sup>

¿Qué espíritu demoledor o que veneno letal existía en la presidencia de la republica, se preguntaba *El Municipio*, "...para que con tanta frecuencia se repitan los derrumbes ministeriales, cayendo por alevoso golpe o por preparada asfixia, los hombres y las reputaciones, las personalidades políticas y los prestigios de otras épocas?".<sup>9358</sup>

A que obedecían, se preguntaba dicho periódico, "...los continuos fracasos y las innumerables y violentas sacudidas que sufre la primera magistratura? ¿Cómo se explica que en ocho meses de gobierno, precisamente en la época preliminar en que los ejecutivos se afianzan y los gabinetes tienden a consolidarse por la propia labor y la expectativa agena, no puede el Dr. Luis Sáenz Peña mantener a sus consejeros y se produzcan sin solución o continuidad desbandes y repudios que cuando no desquician, aíslan?".<sup>9359</sup>

En la frustrada tentativa, se expresaba *El Municipio*, han fracasado "...los dos partidos aliados [Mitrismo y Roquismo], que dentro y fuera del poder, aunaron sus esfuerzos para establecer un gobierno normal y reparador".<sup>9360</sup> Los reiterados fracasos "...con su angustiosa elocuencia demuestran que esos partidos no han tenido la clave de los acontecimientos, ni han acertado con la fórmula de solución que tendía a armonizar el orden y la libertad, entregando la ejecución de este programa a un gobernante con las cualidades del hombre de estado y del discreto político, capaz de manejarse entre las complicaciones de tan compleja tarea".<sup>9361</sup>

La causa del mal era toda una intriga, "...¿residía en el presidente o en los ministros? ¿era producto de una elección desacertada en el nombramiento de los secretarios? ¿Es que los ministros imponen lo inaceptable o es que el presidente exige lo inadmisible? Las crisis ¿se hacen por gusto o por imprescindibilidad?".<sup>9362</sup>

Las desavenencias y la desorientación en el seno de los sucesivos gabinetes había acentuado la división del P.A.N., entre Roquistas y Modernistas. El Modernismo, tendencia política conservadora liderada por Carlos Pellegrini, Ramón J. Cárcano y Roque Sáenz Peña, había hecho rodar la cabeza de Wenceslao Escalante, y puesto "...fuera de concurso a la candidatura del doctor Manuel Quintana, porque sus principios radicales eran inconciliables con la política presidencial que buscaba la concordia con las Cámaras y con las situaciones oficiales de las Provincias – singularmente con la de La Plata".<sup>9363</sup> El Modernismo, una de las dos vertientes del Partido Autonomista Nacional, había desalojado del Gabinete "...a los señores doctor Alcorta, reaccionario moderado, y General [Joaquín] Viejobueno, revolucionario del Parque, según su propia expresión, porque eran un obstáculo a la política adoptada por

el Presidente”.<sup>9364</sup> Pero es preciso tener en cuenta la diferencia entre el Modernismo platense (Costa) y el Modernismo del interior (Cárcano), “...inspirado por una reacción oficial contra el influjo del General Roca en las situaciones de algunas provincias”.<sup>9365</sup> En suma, el Modernismo platense no podía contar, para su defensa, “...ni con los roquistas, ni con los mitristas, ni con los Modernistas del interior, ni menos con los radicales, quienes campean radicalmente con sus medios propios y por su cuenta”.<sup>9366</sup>

#### **F-V.- Desarme oficial en las provincias (1893).**

En medio de esta crisis cuasi-terminal, el Presidente Luis Sáenz Peña convocó en su domicilio particular el 1 de julio de 1893 a tres ex Presidentes (Mitre, Roca, Pellegrini) para conferenciar.<sup>9367</sup> De la reunión privada, el Presidente salió con las manos vacías pues los dos primeros, tras preconizar insistir con la política del Acuerdo, se mantuvieron luego reticentes.<sup>9368</sup> Pero para Sáenz Peña, no había grandes diferencias, pues daba lo mismo un gabinete “...modernista moderado, que un roquista, que un roque-modernista, que un mitrista, que un mitre-roquista, que un quintanista independiente, que un delvallista de alma radical, y por último que un modernista de fuerza dictatorial”.<sup>9369</sup> No le quedaba al Presidente otra opción que atreverse, al igual que el presidente Figueroa Alcorta quince años después, o bien a clausurar el Congreso; o a apelar en su auxilio a la fracción más reformista de la oposición anti-acuerdista. Reducido el presidente al sólo contacto con Pellegrini, tres días más tarde, el 5 de Julio, designa en el Ministerio de Guerra al más encumbrado político anti-acuerdista y ex revolucionario Aristóbulo del Valle, y de Ministro del Interior a Lucio V. López, hijo del autor del himno nacional Vicente López y Planes, quienes iban a durar en los cargos solo 36 intensos y dramáticos días.<sup>9370</sup> Dicho afamado tribuno, que no contó con el apoyo explícito de la Unión Cívica Radical, vino a salvar una presidencia políticamente muerta y a allanar a los radicales “...el camino sembrado de obstáculos y resistencias que amontonaron Roca y Pellegrini para escudar a los opresores”.<sup>9371</sup>

La primera medida de Del Valle a favor de su política de revolución desde arriba --o como equívocamente describe Botana (1977) una “fisura reformista que no cuajó”,<sup>9372</sup> fue firmar un decreto de Desarme, que ordenaba trasladar los parques de artillería provinciales al Arsenal de Guerra, con lo cual se procedía en pos del monopolio de la violencia legítima, y específicamente contra las guardias armadas de los gobernadores de Buenos Aires y Corrientes, que evocaban a los ejércitos privados de los caudillos federales de la época Rosista.<sup>9373</sup> Con el Desarme se rompía “...la vinculación de las complicidades criminales entre los Gobernadores alzados contra el derecho de los pueblos y los gobernantes federales que amparan sus delitos”.<sup>9374</sup> Desde 1891, venía hablándose de una Liga de Gobernadores, con miras de política electoral, “...bajo un pacto que los solidarice en su suerte recíproca; se le dio el nombre de Cuadrilátero del Litoral, a saber, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes”.<sup>9375</sup> En efecto, los cuatro gobernadores correspondientes a dichos estados “...organizaron parques de guerra para armar un ejército formidable de las tres armas”, provistos “...sus depósitos bélicos con rifles de precisión y aún de repetición, con municiones abundantes, con cañones modernos y con ametralladoras”.<sup>9376</sup>

Como era de esperar, ante la arremetida Delvallista, las situaciones provinciales levantaron el espectro de la guerra civil, de la disolución nacional, del país devorado por la anarquía, en suma, la lúgubre reminiscencia del año 20 (por 1820), repudiando la ley “...que ordena la ruptura de las máquinas oficiales de hacer elecciones”.<sup>9377</sup> Tan

agresiva conminación, era para *La Prensa*, un “...incentivo mas para acometer de lleno y de frente la solución del problema, rompiendo con un tajo el depósito de pus que engangrena el organismo político de la nación”.<sup>9378</sup> ¿Como podía ser que fuera motivo de guerra civil, la gestión constitucional del gobierno? El país debía “...doblar la frente y suscribir la imposición que lo despoja del derecho electoral, para no concitar las iras de la usurpación”.<sup>9379</sup>

#### F-VI.- La Revolución desde abajo en las provincias (1893).

El impacto inmediato del desarme en las situaciones provinciales fue el disparador de numerosas revoluciones, destinadas a derrocar los poderes provinciales de origen fraudulento. En el breve espacio de 24 horas, relataba *La Prensa*, en julio de 1893, han hecho su estallido simultáneo tres revoluciones perfectamente justificadas en el terreno de la filosofía política (San Luis, Santa Fe y Buenos Aires).<sup>9380</sup> Se había hecho carne la idea de que era necesidad común el derrumbe de las situaciones provinciales y “...unánimemente se han levantado los pueblos de San Luis, Santa Fé y Buenos Aires, y se disponen a hacerlo las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Santiago y Salta”.<sup>9381</sup>

Jacinto Videla en San Luis es derrocado el 29 de julio y Juan M. Cafferata en Santa Fe cae el 30 de julio para ser reemplazado por una junta presidida por el radical Mariano Candiotti, la cual dura escasos dieciocho días; y Julio A. Costa en Buenos Aires; Próspero García en Tucumán; Sabá Hernández en Entre Ríos; y Delfín Leguizamón en Salta “...oscilan próximos a despeñarse...tienen decretado el derrumbe”.<sup>9382</sup> Gustavo Ferrari en Catamarca y Antonio Ruiz en Corrientes, verdaderos señores feudales, “...no pueden sostenerse por más tiempo, y el mismo [Domingo] Morón de San Juan espera en sus dominios el movimiento popular que ha de obligarle a descender a los tres meses de gobierno”.<sup>9383</sup> Nadie era en ese entonces capaz de detener “...el torrente que avanza amenazador y vertiginoso para arrollar y hundir las oligarquías del roqui-juarismo; nadie posee fuerza moral bastante para poner un dique al impulso avasallador que a sangre y fuego voltea situaciones y hace polvo sistemas de recuerdo maldito”.<sup>9384</sup> Fueron tres revoluciones eminentemente populares, constituidas por “...grupos de pueblo armado, con ciudadanos espectables y con juventud distinguida a la cabeza, los que atropellan las posiciones fuertes, las guardias pretorianas de los Gobiernos oligárquicos, cuyas balas reciben con el pecho descubierto”.<sup>9385</sup>

En San Luis, en Santa Fe y en Buenos Aires se reproduce “...ese mismo cuadro de líneas vigorosas, donde se chocan las dos corrientes políticas, o sea, el oficialismo concretado a sus elementos de fuerza pagados por los Tesoros fiscales y el pueblo armado para la reivindicación desesperada de sus derechos”.<sup>9386</sup> Ante la embestida popular, o revolución desde abajo, el gobierno de Buenos Aires solicitó la intervención federal; pero al rechazar el Congreso la solicitud, el gobernador Julio A. Costa presentó su renuncia.<sup>9387</sup> Las revoluciones, libradas a sus propios impulsos, prosiguieron su rumbo, “...concluyendo unas con la victoria, como las de San Luis y Santa Fe, y robusteciéndose Buenos Aires, hasta estrechar al Gobernador y Vice y al tercer reemplazante [Guillermo Doll] en una situación, sin salida, que los compelió a despejar el campo, y en consecuencia, a facilitar y a apresurar el desenlace del pronunciamiento”.<sup>9388</sup> En cuanto a Buenos Aires, el Ministro del Valle se trasladó personalmente por vía fluvial a La Plata, aceptó la renuncia de Doll, ocupó la ciudad y licenció a las fuerzas legales comandadas por el Coronel Ramón L. Falcón.<sup>9389</sup> Pero reanudado el avance de las fuerzas de la Unión Cívica Nacional el 9 de agosto, se vio

obligado a disuadir al Gral. Campos de sus propósitos ofensivos.<sup>9390</sup> Mientras tanto, las fuerzas Radicales estaban al acecho en las puertas de La Plata.<sup>9391</sup> Y en Santa Fe, victoriosa la revolución, el gobierno provisorio perduró durante escasos dieciocho días, desde el 3 de agosto al 21 de agosto de 1893.<sup>9392</sup>

#### F-VII.- Alzamiento de grupos de paisanos armados (1893).

El alzamiento de grupos de paisanos o campesinos armados fue una pauta corriente en casi todas las revoluciones cívico-militares. En la de 1893, la proliferación de Piquetes armados en todas las provincias donde se produjeron alzamientos fue una constante.<sup>9393</sup> Para las Ordenanzas de Carlos III, plenamente vigentes en ese entonces en el ejército argentino, “el alzamiento de grupos de paisanos armados no configura rebelión militar”.<sup>9394</sup> Conscientes en ese entonces de dicha figura jurídico-militar y su inmunidad penal muchos militares apelaban a la misma, como una suerte de subterfugio, esgrimiéndola en las declaraciones indagatorias a las que eran sometidos en los Consejos de Guerra.

En ese sentido, el Tte Cnel. Baldomero Álvarez aseguraba casi cuarenta años después, en enero de 1930, delatando su antigua filiación Mitrista y por tanto Acuerdista, que “...he tomado participación activa como militar de los sucesos revolucionarios de 1893. Que dicha participación ha consistido en presentarse al Tte. Cnel Franklin Rawson, antiguo Mitrista, en la Estancia de Pereyra, próximo a La Plata, como revolucionario para combatir contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Julio A. Costa. Que el mencionado Rawson “...era el Jefe de una columna revolucionaria de paisanos montados y de a pié”.<sup>9395</sup> A órdenes del comando revolucionario, y en unión del Capitán Carlos Paz [6-10-I], el Teniente Coronel Álvarez organizó el Escuadrón de voluntarios “Brandzen” y “...formando en él tomé parte en los diferentes hechos de armas ocurridos esos días”.<sup>9396</sup> Álvarez actuó con patrullas “...de diez a veinte hombres, saliendo siempre de los montes de Pereyra en dirección a Villa Elisa y La Plata, peleando frecuentemente contra fuerzas gubernistas de Guardia Cárceles que defendían la ciudad y que estaban al mando superior del Coronel [Ramón L.] Falcón”.<sup>9397</sup>

En uno de esos entreveros, que debe de haber sido lo que se denominó el encuentro de Tolosa o la batalla de Ringuelet, detalladamente descripta en el parte de guerra que el 13 de agosto de 1893 remitió el Coronel Ramón L. Falcón al Vicepresidente del Senado en ejercicio de la gobernación Guillermo Doll,<sup>9398</sup> Baldomero Álvarez recibió “...una herida en la rodilla izquierda que no era de gravedad, pero que le impidió montar a caballo. Que junto con el exponente fueron heridos otros paisanos más”.<sup>9399</sup> Víctimas mortales del encuentro de Tolosa resultaron los jóvenes Guillermo Quirno y Alfredo Leguizamón.<sup>9400</sup> En tanto, Álvarez permaneció durante unos días, “...con la herida de referencia en los **Montes de Pereyra** [estancia San Juan de Leonardo Pereyra Yraola], hasta que fue autorizado por el Jefe de la Columna mencionada a retirarse a su domicilio. Que el deponente tenía entonces el grado de Teniente 2º y pertenecía al Primer Escuadrón del Regimiento 7 de Caballería de Línea de guarnición en Santa Catalina, provincia de Buenos Aires, cuando se presentó a fines del mes de julio de 1893 al Jefe de la Columna Revolucionaria [Franklin] Rawson. Que como la revolución fracasó el declarante no se presentó a su Regimiento para evitar la sanción correspondiente; por lo que fue dado de baja junto con otros oficiales en el mismo Decreto”.<sup>9401</sup> La característica de la mencionada revolución, en la parte que a

Baldomero Álvarez le tocó actuar, fue "...la de tomar parte en pequeños combates aislados de revolucionarios civiles dirigidos por caudillos de ellos mismos contra fuerzas organizadas, como ya ha expresado. Que como consecuencia de esta participación, el deponente fue puesto preso con centinela de vista en el Regimiento 9 de Caballería, de guarnición en Buenos Aires, barrio de Palermo, de donde consiguió fugarse a los pocos días estando de guardia el Alf. Pedro A. Quiroga (35-77-I), hoy Mayor retirado".<sup>9402</sup>

#### **F-VIII.- Revolución desde arriba y el compromiso revolucionario del Ministro de Guerra (1893).**

El compromiso del Ministro de Guerra Aristóbulo del Valle con una concepción del gobierno republicano y democrático como revolución desde o por arriba (ya anunciada por el propio presidente Luis Sáenz Peña), o revolución pasiva,<sup>9403</sup> destinada a imponer la modernidad, parecía tomado a imagen y semejanza de la políticas ensayadas en Alemania por Bismark (1871), en Italia por Mazzini (1860-69) y en el Japón por la revolución Meiji (1866-68).<sup>9404</sup>

Para cerciorarnos de esta sospecha como muestra "basta un botón". El mayor del ejército Expedicionario al Desierto Amador Molina confesaba que la noche del 30 de Julio de 1893, estando en su casa, ya en cama, siente que "...tocan la campanilla en la puerta de calle, me levanto y voy a ver quien era y me encontré con mi amigo Carlos Merlini, que me dijo: el Ministro de la Guerra Dr [Aristóbulo] del Valle te manda esta tarjeta y que vayas conmigo a la Casa de Gobierno que te necesita con urgencia, la tarjeta decía lo siguiente: "Amigo Capitán le estimaré pase por mi despacho, tengo que encomendarle una comisión".<sup>9405</sup> Molina se fue con Merlini y al llegar a la Casa de Gobierno el Ministro del Valle le dijo: "...Ud y su amigo Merlini se van a ir a Mercedes, porque el 31 de Julio va a estallar una revolución en toda la provincia para echar abajo a los....Ud, le entregará esta carta al Jefe Civil de la Revolución en el Oeste Dr. Augusto Elías y Merlini lleva para los gastos, después de esto se le reconocerán sus servicios y será reincorporado".<sup>9406</sup>

Con la carta del Ministro del Interior Aristóbulo Del Valle, quien estaba particularmente interesado en voltear al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Julio A. Costa (sin tener en cuenta que Costa fue el primer gobernador en desprenderse de la tutela de Roca y quien postuló la candidatura modernista de Roque Sáenz Peña), Molina se presentó al Dr. Elías y a partir de ahí, "...principiamos a arreglar todo para el 31 a las doce, tomar la Policía, la Municipalidad y la Cárcel que estaba custodiada por tropas pertenecientes al Batallón Provincial, todo fue muy bien, se tomó con poca dificultad la Policía y la Municipalidad".<sup>9407</sup> Mientras se hacía esto y se trataba de hacer entregar la cárcel, cuando ya estaba casi todo terminado, "...se presentó una dificultad, el Comandante Mena al servicio del Gobierno del Dr. [Julio A.] Costa que estaba en Luján se corre sin ser sentido y se introduce en la Cárcel de Mercedes con cien hombres bien armados y municionados, como nosotros teníamos muy pocas fuerzas y escasas municiones se pidió protección a los Tenientes Coroneles D. Sebastián Pereyra y D. Ponciano Torres que andaban por el Bragado uno y por el Salto el otro".<sup>9408</sup>

Al otro día llegaron ambos Pereyra y Torres a Mercedes y atacaron al Comandante Mena, muriendo "...tres oficiales y diez o quince de tropa por ambas partes, al fin el

Comandante Mena se rindió. Ese día todo quedó en poder del Dr. Elías, yo me hice cargo de la Policía y la Cárcel, arreglé convenientemente todos los servicios”.<sup>9409</sup> En ese momento, el Jefe de 9 de Julio Dr. José María Páez avisó “...que se necesitaba un refuerzo, que la Policía no se rendía. El Dr. Elías dispuso que marchara Merlini con cincuenta (50) hombres a ayudar a los correligionarios de 9 de Julio. Volvió Merlini dejando todo arreglado”.<sup>9410</sup> Pero el día 9 de Agosto, llegó a Mercedes el General Francisco Boseli o Boselli con el regimiento 2 de Caballería, “...el que se hizo cargo de la Policía y otro piquete al mando del Capitán Pedro Zuriezno se hizo cargo de la Cárcel, todo lo que fue entregado en el mayor orden”,<sup>9411</sup> y después de la derrota el Mayor Molina se quedó en Mercedes “...con los Señores Nogués, todos radicales”.<sup>9412</sup> En suma, la caída del Ministerio del Valle significó un fracaso a medias de la revolución desde arriba, por cuanto al menos se logró que cuajara una cierta monopolización de la violencia legítima.

Pero para los intelectuales de vanguardia como Germán Ave Lallemant, y para los partidos representativos de la naciente clase obrera, como el Partido Socialista Argentino, y también el Uruguayo, influidos por la falsa divisoria entre revoluciones políticas y sociales, y por la ideología de la Segunda Internacional y su tratamiento positivista de la dialéctica y de la infalibilidad teórica del partido de clase (Wright, 2003), las sublevaciones cívico-militares como las acontecidas en 1890, 1893 y 1905 en Argentina; las de 1897 y 1904 en Uruguay; e incluso la revolución desde arriba operada en Argentina por el Ministerio del Valle (1893), habrían correspondido a las inveteradas prácticas de los partidos políticos de la burguesía y de sus estados burgueses.

Para estos intelectuales y partidos clasistas como el Socialista, que ignoran o subestiman el impacto de todo otro clivaje (étnico, nacional, cultural) que no sea el de la clase social, la estrategia a emplear debía ser la de la oposición parlamentaria y anti-militarista, pues la obra de regeneración política “...corresponde por entero al pueblo trabajador, organizado a este objeto en partido político de clase, único capaz de llevarla a buen término en su propio beneficio”.<sup>9413</sup> Paralelamente, *La Protesta*, órgano del anarquismo, refiriéndose a la Revolución de 1905, consideraba que “...el elemento obrero debe alejarse de esos simulacros sangrientos que no rozan la superficie de la constitución social, y evolucionar en el sentido de la revolución económica que hoy se gesta, empujando a la humanidad hacia una nueva fórmula de vida, mas en armonía con las leyes fundamentales que nos rigen”.<sup>9414</sup> Estos juicios lapidarios venían a coincidir paradójicamente con los de la extrema derecha del arco político.<sup>9415</sup>

#### **F-IX.- Derivaciones político-militares del desarme y de las revoluciones desde abajo en las provincias.**

Sin embargo, la política anti-intervencionista en las provincias --postulada por el Ministro Aristóbulo Del Valle-- no habría de perdurar, pues la división de la Unión Cívica, entre los cívicos nacionales y los cívicos radicales, al trasladarse a la esfera militar vino a otorgarle al Modernismo (Roque Sáenz Peña y Cárcano) el pretexto de la necesidad urgente de una pronta intervención en Buenos Aires.<sup>9416</sup> En efecto, las columnas revolucionarias armadas que se dirigían a La Plata respondían tanto a la Unión Cívica Nacional (UCN), como a la Unión Cívica Radical (UCR). Por un lado, la Unión Cívica Nacional ya había roto con el Acuerdo, y estaba al mando militar del General Manuel J. Campos.<sup>9417</sup> Por otro lado, la columna que había acampado en

Temperley, obedecía a la jefatura de la Unión Cívica Radical y estaba al mando militar del Mayor Manuel J. Guerrero.<sup>9418</sup> Ya no se trataba de desalojar los gobernantes infidentes a su mandato, se trataba ahora --según lo advierte el periodista que firmaba con el seudónimo de Grapho en *El Municipio*--, "...de una lucha intestina entre los partidos populares que se disputan la posesión del gobierno acéfalo, y en esta rivalidad van a comprometer la paz pública, a bastardear las aspiraciones nacionales con las pasiones banderizas".<sup>9419</sup>

Otra de las derivaciones del desarme y de las revoluciones desde abajo en las provincias había sido la de acentuar la división del P.A.N., entre Roquistas y Modernistas, y la de anular políticamente al Gral. Roca. El jefe de todos estos grupos, "...organizados para el usufructo de la impunidad, y cobijados por el pomposo título de autonomistas, cae con los gobernadores que lo sostenían y se hunde con la situación que se derrumba".<sup>9420</sup> En plena gestión Delvallista, y como derivación de la puesta en práctica de la política de desarme, el 7 de agosto de 1893, Roca renunció a la senaduría nacional por Tucumán y pidió su baja del ejército, "...comprendiendo que usurpaba una representación que ya ningún provecho podía darle, y que como militar su prestigio había caducado".<sup>9421</sup> La renuncia del cargo de senador y el pedido de baja del ejército pueden haber sido resoluciones "...tomadas con el fin de obtener mejor libertad de acción, o estratagemas hartamente conocidas por su repetición para maniobrar en la sombra y sin sospechas".<sup>9422</sup> Mientras Roca tuvo a su favor el apoyo o "...la pasividad de los presidentes; durante el período del Dr. Pellegrini y los primeros meses del gobierno Sáenz Peña, el roquismo desbandado se rehizo y se impuso. Hoy que las leyes priman sobre los caprichos y los pueblos gozan de libertad para exigir sus derechos, el roquismo se descompone y evapora".<sup>9423</sup>

Como corolario de la renuncia de Roca al Senado, Pellegrini vuelve el 2 de agosto de Rosario de la Frontera (Salta), y asume la dirección del partido oficialista (P.A.N.).<sup>9424</sup> En su viaje de retorno, Pellegrini vio a los Gobiernos provinciales intranquilos, "...interrumpidos los servicios ferrocarrileros, y presididas algunas provincias por Gobiernos provisorios: pero su espíritu no experimentó --según lo advierte *La Prensa*-- la más mínima contrariedad cuando en su viaje de ida visitó provincias destituidas de vida política regular, como tampoco le sugirió la mínima observación la obstrucción de largos años del régimen constitucional y la interrupción del sufragio popular".<sup>9425</sup> Para Pellegrini, según *La Prensa*, tenía más importancia "...el funcionamiento regular de los trenes cargados de cueros y de granos, que la paralización sistemática por años y años del funcionamiento del derecho de los hombres: el ideal parece ser el funcionamiento perpetuo de los resortes de la oligarquía".<sup>9426</sup>

La división en el seno de la Unión Cívica, es decir la estrategia de dividir a las fuerzas populares, frente a los despojos del régimen modernista de La Plata (Costa), "...suministra a la conspiración (roqui-modernista) la atmósfera vital que necesitaba", para pasar de contrabando, bajo la bandera de una de las facciones cívicas, la "mercancía infecta del antiguo régimen", y es asimismo una ocasión para reconstruir "...la rota unidad del partido oficial, con su mira eterna, la de proseguir su dominación política y administrativa de la República".<sup>9427</sup> En esa oportunidad, el gabinete de Luis Sáenz Peña entra en estado de deliberación, con algunos ministros a favor y otros en contra de la intervención a Buenos Aires.<sup>9428</sup>

Del Valle proponía también una estrategia de intervención amplia y no una destinada únicamente para restituir gobernantes caídos.<sup>9429</sup> Los fundamentos de las leyes de intervención en trámite y el punto de apoyo de la política nacional, están precisamente según el editorialista de *La Prensa*, "...en el reconocimiento de la personería y del poder político de las revoluciones triunfantes".<sup>9430</sup> Si se les desconociera esa capacidad, las intervenciones "...cambiarían en el acto de naturaleza y de fines: no existiría el hecho de la caducidad de los Poderes denunciados por faltar la entidad que la operó y decretó con el derecho de las armas vencedoras".<sup>9431</sup> Pero ya la conjura o conspiración estaba muy avanzada, y Del Valle se vio obligado a renunciar, debido al fracaso en lograr que las cámaras aprobaran su propio proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires.<sup>9432</sup> Del Valle había expresado en el Senado con valentía que "...no solicitaba autorización para intervenir en las aludidas Provincias para reponer Gobernadores, sino para desconocer su legitimidad y presidir elecciones libres".<sup>9433</sup>

#### **F-X.- El fracaso de la revolución desde arriba y el pretorianismo indirecto del Ministerio Quintana (1893).**

Es entonces que, con el apoyo de Roca y de Pellegrini, retorna al gabinete el Dr. Manuel Quintana, por segunda vez en la presidencia de Sáenz Peña el 12 de agosto, decretando cinco días después, como primer medida, el estado de sitio en todo el país (que dura hasta el 16 de febrero de 1894), así como la intervención de las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe.<sup>9434</sup> Lamentablemente, el criterio pretoriano adoptado por Quintana para intervenir las provincias no se compadecía con su propia doctrina, la cual establecía --en declaraciones formuladas el 22 de octubre de 1892-- que el deber de todo interventor era: "...averiguar si el poder moral y material de la nación no es requerido para consolidar una tiranía o conservar un despotismo; averiguar si esos poderes que invocan la protección nacional, son dignos y acreedores a que la nación gaste sus recursos y sacrificios de sus conciudadanos para mantenerlos en el poder que ejercen; averiguar cuáles son los títulos, cual es la situación constitucional de los poderes que han requerido la intervención, porque la garantía no es solamente a los poderes, es también a los pueblos".<sup>9435</sup>

Una vez designado el prestigioso productor ganadero Eduardo Olivera como Interventor, se producen en La Plata con motivo del desarme de las tropas revolucionarias cruentos sucesos.<sup>9436</sup> El acto del desarme se había llevado a cabo de "...una manera humillante y que la dignidad militar lo prohíbe hasta con los rendidos, se hacía ante el general Bosch, primo político del ex gobernador Costa, de Carlos J. Costa hermano de este [posteriormente ultimado en un tiroteo ocurrido en Bragado, Pcia. de Buenos Aires], y de sus íntimos amigos".<sup>9437</sup> No solo se les quitaba los remingtons, sino también "...las espadas a los oficiales revolucionarios, lo que se debe tomar como una ofensa. Por eso hubo quienes ante esta infamante imposición quebraron sus espadas arrojándolas al suelo".<sup>9438</sup> Los radicales, ante la actitud ultrajante del general Bosch, no debieron según *El Municipio*, "...mandar sus soldados a entregar las armas, sino mandárselas por carros o dejarlas en el campamento para que las recogieran".<sup>9439</sup> Posteriormente, Olivera es reemplazado por el Gral. Francisco B. Bosch, el responsable de la mortal represión ocurrida en la estación de La Plata.<sup>9440</sup>

Durante el año de su gestión apunhaladora de la presidencia Sáenz Peña, el Ministro Quintana reprimió duramente las sucesivas insurrecciones de Corrientes y Santa Fe, y

como derivación del estado de sitio arrestó a Leandro Alem, manteniéndolo un mes incomunicado.<sup>9441</sup> En sus conmovedoras cartas desde la prisión dirigidas a Joaquín Castellanos y a Adolfo Saldías, Alem denuncia la traición de altos oficiales, que no identifica pero que faltaron a su palabra.<sup>9442</sup> En lo que hace a la provincia de Santa Fé, aunque parcial, algo se ha escrito y publicado acerca de la ofensiva revolucionaria de las colonias suizas y de las tácticas de guerrilla urbana contra el cuartel 9 de caballería, acampado en la Escuela de Derecho (Santa Fe).<sup>9443</sup> Finalmente, habiéndose comprometido con la represión de Santa Fe y Corrientes, lo que se prestó al juego del roqui-modernismo, el Presidente Luis Sáenz Peña no quiso continuar en la presidencia y presentó en enero de 1895 su renuncia indeclinable, asumiendo el vice-presidente José Evaristo Uriburu, quien se caracterizó luego por desplegar una beligerante política exterior de paz armada con Chile y una política interior divisionista de la coalición opositora.

Destruído así definitivamente el Acuerdo Roca-Mitre, que había resucitado en el último tramo Quintanista de la presidencia de Luis Sáenz Peña (1893-94), entró a jugar una nueva estrategia en el seno de la oposición, denominada política de las paralelas, consistente en una política concurrencista, de oposición puramente parlamentaria, encolumnada contra el P.A.N., que estaba monopólicamente controlado por Roca.<sup>9444</sup> Esta política se manifestaba en la alianza de los Cívicos Nacionales o Mitristas con la fracción más moderada y reformista del radicalismo, constituida por los Radicales Bernardistas (mazorqueros o Irigoyenistas o Derquistas).<sup>9445</sup> A esta estrategia opositora concurrencista y no beligerante se opuso la fracción intransigente o hipolitista, seguidora de Hipólito Yrigoyen, dividiéndose con ello la Unión Cívica Radical, y dando así lugar a un nuevo triunfo de Roca.<sup>9446</sup>

## **F-XI.- La “dictadura anónima” y los riesgos de la conjura (1896-98).**

Transcurridos casi medio siglo desde la derrota de la restauración absolutista (dictadura Rosista), y casi tres años desde el fracaso del proceso revolucionario (1890-1893), la desviación del sistema republicano de gobierno bajo la presidencia de José Evaristo Uriburu era tan pronunciada, que para algunos prestigiosos periodistas se presagiaba un futuro tenebroso.

Bastaba tener en cuenta lo que había sucedido en varios países de América Latina y aún de Europa, sostenía el editorialista de *El Tiempo*, para comprender “...que no exageramos”.<sup>9447</sup> Si en la República Oriental fueron posibles las dictaduras de Lorenzo Latorre (1876-79) y de Máximo Santos (1882-86), en la de Brasil la de Floriano Peixoto (1891-94), en Venezuela la de Antonio Guzmán Blanco (1870-77, 1879-84), y en Bolivia las de Mariano Melgarejo (1864-71) e Hilarión Daza (1876-80), fueron debido “... a la preponderancia que en esos países había alcanzado el elemento militar considerando lícito llevar a cabo lo que pudiera directamente interesarle, a pesar de que se pisoteara la constitución y se violara la soberanía nacional”.<sup>9448</sup> Es así como, concluye *El Tiempo*, que esos estados presenciaron “...las más atroces iniquidades, y es así también como de la dictadura se llegó a la tiranía, que dejó señalado su paso con manchas indelebles que la historia registra con caracteres negros”.<sup>9449</sup>

Sin embargo, el editorialista no quería llevar su pesimismo hasta el extremo de creer posible en Argentina la consumación “...de los crímenes nefandos de otra época

[Rosismo], pero, dígame lo que se quiera en contrario, es un hecho que, si no se sobreviene la reacción, no pasará mucho tiempo sin que el militarismo se imponga por sobre todo, no guardando siquiera las formas, que es lo que se hace actualmente”.<sup>9450</sup> Pero ¿cómo se había llegado a ese extremo de pesimismo? Para contestar dicha pregunta no se necesitaba a juicio del editorialista gran penetración: “...Hemos llegado a este extremo, porque los hombres del poder han relajado la disciplina militar, ya sea concediendo favores o ya ascensos más o menos inmerecidos, con el único fin de ver realizados sus sueños ambiciosos, mediante el apoyo de la fuerza”.<sup>9451</sup> Se había llegado a dicho extremo, “...porque desde unos quince años a esta parte [es decir desde 1880] se dio intervención activa en la política al militarismo, presenciando impasibles los hombres de gobierno los abusos que a favor de tal o cual candidato oficial se han venido cometiendo”.<sup>9452</sup> Y, finalmente, se había llegado a dicho extremo, “...porque a la tropa de línea se la ha convertido en apuntaladora de mandones insolentes, subvirtiendo así la honrosa misión que le señala la carta fundamental”.<sup>9453</sup> Cuán extraño podía ser entonces, “...¿si en la mayoría de las provincias argentinas, la voluntad del jefe de un batallón o de un coronel con mando de fuerzas, se sobrepone a la de los gobernadores y de los ministros, hasta el extremo de que no se hace absolutamente nada sin tener la anuencia de esos militares?”.<sup>9454</sup>

Los hombres que se hallaban en el poder y que habían llevado el país al borde del abismo, “...han conseguido, mediante artificios ruines, favoritismos escandalosos y complacencias corruptoras, han conseguido, decimos, convertir al glorioso ejército argentino en su aliado, su pedestal, sobre el cual descansan seguros, llevando a cabo con inaudito descaro inmoralidades sin nombre que comprometen el decoro y, a veces, hasta la honra de la patria”.<sup>9455</sup> De ahí, sostiene el editorialista, que haya sido posible la existencia de una dictadura tácita o “...la dictadura anónima que rige actualmente la república, sin que se vislumbre ni siquiera el más lejano síntoma de reacción”.<sup>9456</sup> Con casi medio siglo de antelación, asoma el mismo temor que desesperó a Hanna Arendt: “la silenciosa dictadura anónima de las oficinas”.

Por el contrario, podía afirmarse que dicha dictadura tácita o implícita se fue afianzando día a día, “...contando siempre con el apoyo de la tropa de línea”.<sup>9457</sup> Para ello se habían recreado las antiguas oficinas de enganche “...cuya misión, como lo hemos dicho ya, ha de constar principalmente en apuntalar gobernadores y en formar un buen plantel electoral para favorecer en todo tiempo los planes de los hombres que des gobiernan el país”.<sup>9458</sup> Más aún, esas oficinas de enganche se convertirían, “...desde el mismo día de su instalación, que será dentro de breve, en algo así como en espada de Damocles suspendida sobre la cabeza del pueblo, pronta a caer el día en que ese mismo pueblo, cansado de tanta infamia, tratare de reconquistar sus derechos y de obtener el imperio de la libertad”.<sup>9459</sup> No, lo que estaba ocurriendo en Argentina no podía causar sorpresa a nadie, “...como no puede sorprender la afirmación que hacemos al principio de estas líneas, de que marchamos camino de la dictadura”.<sup>9460</sup>

A la mencionada desviación del republicanismo, seis meses más tarde, otro texto anónimo que llevaba por título el mismo encabezamiento que el que en octubre de 1895 se había publicado en *El Municipio* de Rosario, sostenía que a dicha deformación el pueblo en su orfandad “...se habitúa con facilidad creciente”.<sup>9461</sup> Los ciudadanos han “...perdido la fe en las instituciones, la confianza en el esfuerzo ordenado y pacífico, no hay entusiasmo y no alumbra ya la luz de los grandes ideales: no hay ni la sombra de las virtudes y todas las debilidades y todos los vicios triunfan, adornados con las galas de

un progreso material que olvida el alma del pueblo y destruye la fuente de las grandes acciones”.<sup>9462</sup>

El colosal progreso material que se enseñorea de la economía argentina, luego de la crisis financiera de 1890, “...oculta una profunda decadencia cívica y cultural, una gran perversión moral”.<sup>9463</sup> Los argentinos se acercan “...rápidamente a la dictadura, a la dictadura de los pequeños, porque ya no somos capaces de alimentar una dictadura de grandeza trágica [Cromwell, Napoleón], sino tiranías oscuras, tiranías venales, canallescas, calculadoras y cobardes”.<sup>9464</sup>

A los errores y las debilidades de los que era responsable la dirigencia argentina (Acuerdo Roca-Mitre), se unían circunstancias excepcionales que facilitaban el camino del candidato a dictador. Entre otros factores surgían los amagos de un conflicto externo [Paz Armada con Chile], que externalizando al enemigo, “...hieren viva la imaginación popular, hacen olvidar los graves problemas internos y contribuyen poderosamente a acallar las iras que duermen en millones de pechos argentinos [desinternalizan la guerra]”.<sup>9465</sup>

Como los hongos que crecen en la humedad y en la sombra, “...así las raíces de las dictaduras se afirman y extienden al amparo de la indiferencia y del enervamiento de los ciudadanos. Así nace el árbol funesto, cuya sombra mata la honra, la libertad y la gloria de un pueblo: el árbol que no es posible derribar con el golpe paciente del leñador, sino con el rayo de las negras tempestades”.<sup>9466</sup> Para dominar a un pueblo que otrora “fue altivo y soberbio”, ya no se necesitaban como en la antigüedad clásica (el Hierón de Jenofonte) o en la modernidad absolutista (Cromwell o Lorenzo de Médici) las cualidades excepcionales de los grandes déspotas, pues a fines del siglo XIX “...un politiquero audaz, adornado con falsas prendas políticas, es dueño de todas las situaciones de provincia, ejerce influencia prepotente en la marcha del gobierno general y se prepara a arribar al solio de la dictadura”.<sup>9467</sup> Los esfuerzos aislados y desordenados del pueblo “...que aún conserva una noción de su dignidad y de sus deberes, son vencidos fácilmente y no constituyen ni una débil barrera”.<sup>9468</sup> Tan sólo un muñeco, una grotesca marioneta, “...un espantajo semejante al que los chacareros ponen en sus sembrados para ahuyentar las aves dañinas, nos infunde pavor, nos domina”.<sup>9469</sup> El pueblo, en su caída, “...ve agrandados los objetos, y confunde a Roca con un gigante, contra el cual es inútil todo esfuerzo, y se echa boca abajo en tierra, sin atreverse a hacer un movimiento en contra de una sombra”.<sup>9470</sup>

Sí, afirma el redactor de este elocuente documento, Argentina se acercaba “...rápidamente a la dictadura que tendrá el nombre oficial de segunda presidencia de Roca. Hoy mismo la tenemos realizada en gran parte, en el terreno de los hechos, como en el dominio moral”.<sup>9471</sup> Todos los entonces gobernadores de provincia estaban “...preparados y decididos a hacer triunfar la candidatura de Roca: lo dicen sin reparo, como la cosa más natural del mundo y como si se tratara de algo decretado por la providencia”.<sup>9472</sup>

El Congreso, que no alcanzaba a representar ni una mínima fracción del pueblo argentino, “...seguirá obedeciendo ciegamente las órdenes de Roca, sirviendo su política y dando el sello de legalidad a sus maquinaciones y maniobras”.<sup>9473</sup> Entre su clientela cautiva, “...la administración nacional, el mismo ejército, son poderosos

auxiliares del politiquero astuto, que por medio de empleos, de concesiones, y de grados, sabe aumentar sus prosélitos”.<sup>9474</sup>

Amén del fraude electoral, tampoco se castigaba a los grandes delincuentes, “...a los que comerciaron con la cosa pública, a los que defraudaron los intereses del fisco, a los que se han enriquecido en las oficinas y dependencias del ministerio de guerra, aunque haya perfecto lugar para una acusación y una condenación”.<sup>9475</sup> El general Roca conocía al dedillo el grado de corrupción a que habían llegado sus compatriotas, “...y al mismo tiempo que los intimida con la fuerza que se desprende del manejo discrecional de los dineros públicos, explota su sensualidad, e indiferencia: en este triste extremo nos encontramos y mañana seremos esclavos, vestidos de seda, con ferrocarriles, con riquezas; pero esclavos al fin”.<sup>9476</sup>

Por último, la experiencia ha demostrado que en todos los pueblos “...sólo hay un corto número de individuos capaces de todo, antes de dejarse subyugar y esclavizar, ellos salvan muchas veces a sus compatriotas, por la acción, y sobre todo por el ejemplo”.<sup>9477</sup> Por ello, y alentando el secreto anhelo de un nuevo levantamiento armado, el autor de este emblemático documento se preguntaba: “¿Los hay en nuestro país?”.<sup>9478</sup> Recordando las lecciones de la historia, y teniendo en cuenta la naturaleza humana, el modo de ser y el grado de cultura del pueblo argentino, dicho autor culminaba su escrito, que bien podría tratarse de un testamento político, sosteniendo “...podemos afirmar, sin temor de equivocarnos, que en estos momentos [1896] se cierran todos los caminos de la evolución [progreso]”.<sup>9479</sup>

Sin embargo, si bien es cierto que el camino de las urnas estaba cerrado para los ciudadanos, faltando las condiciones esenciales para el ejercicio de los derechos políticos; y si también es cierto “...que la vieja armazón del oficialismo, aunque carcomida y bamboleante, todavía es un obstáculo para el triunfo de la voluntad popular y que los detentadores del poder, con pertinacia insolente, aprestan sus viejas armas para mantenerse en sus posiciones”, asimismo era verdad que el partido radical “...no cree que la revolución [armada] sea el único camino abierto a su actividad, y que hoy o mañana sus anhelos patrióticos y sus esfuerzos generosos, sin recurrir a los medios extremos, pueden realizar conquistas benéficas, con sólo mantenerse unido y fuerte, entusiasta y vigilante”.<sup>9480</sup>

Para el partido radical la conjura y la revolución eran un legítimo derecho para combatir las dictaduras, un derecho “...que importa grandes responsabilidades y del cual sólo puede hacerse uso en circunstancias que no son las actuales”.<sup>9481</sup> Confirmando ese diagnóstico negativo, alimentado probablemente por la creciente amenaza de guerra con Chile, el autor del documento revela que la conjura y la revolución “...no está hoy en los espíritus, no encuentra arraigo en la realidad”.<sup>9482</sup> Para que en vísperas de la elección presidencial de 1898, una conjura tuviera éxito militar, y no corriera el riesgo de pervertirse “convirtiéndose en estratagema de ambiciones políticas” o de “sacrificio de un chivo expiatorio”, el partido radical tendría que darle a la misma “...un carácter general, conflagrar a la república entera, porque un movimiento aislado en determinadas provincias sólo conduciría al sacrificio, y, lo repetimos, no es ese su programa”.<sup>9483</sup>

El Radicalismo tenía --a juzgar por este documento, publicado seis meses después del suicidio de Alem-- la noción del tiempo y comprendía el carácter de cada época, “...sabe que su manera de actuar, su táctica, sus movimientos tienen que ajustarse a las

peculiaridades de cada momento”.<sup>9484</sup> El propio Maquiavelo sostenía que para las conjuras era preciso contemplar contradictorias temporalidades: “...ritmos que propician la anticipación y ritmos que más bien aconsejan diferir y aplazar la ejecución”.<sup>9485</sup> No debía el Radicalismo “...esterilizar sus energías, o buscar la muerte en el martirio cruel ni en la revolución infructuosa”.<sup>9486</sup> A comienzos de 1897 el futuro presidente de la república era una incógnita, y para despejarla “...será probablemente necesario el concurso del partido radical, cuya influencia no desconocen sus adversarios, y por eso mismo tratan de presentarlo como a una agrupación desesperada, pronta a entrar en el camino de agitaciones estériles. Su actitud es bien distinta”.<sup>9487</sup>

## **F-XII.- Conclusiones.**

Para frenar la crisis revolucionaria orgánica, iniciada en Julio de 1890 y aún vigente en 1893, los intereses internos y externos amenazados comenzaron una contraofensiva destinada a debilitar y vaciar el frente revolucionario democrático-popular mediante tácticas y estrategias divisionistas. Una de esas tácticas fue seducir políticamente con una efímera componenda electoral a la fracción más reformista de la coalición revolucionaria, que en ese preciso caso fue el Mitrismo con su política del Acuerdo, y como más tarde durante la presidencia de José Evaristo Uriburu lo fue el Bernardismo o Irigoyenismo (por Bernardo de Irigoyen) con su política de las “paralelas”.

## **Capítulo IV-B-7 El Abstencionismo Armado y las Estrategias y Tácticas Insurreccionales.**

### **Índice del Capítulo IV-B-7**

- G.- El Abstencionismo Armado y las Estrategias y Tácticas Insurreccionales.
  - G-I.- Silencio, secreto y abdicación en la conjura (1905).
  - G-II.- Vulnerabilidad militar de los regimientos de conscriptos (Rosario, 1905).
  - G-III.- Transformación del motín en insurrección, y de la insurrección en motín y su desencadenamiento en tragedia (Corrientes, 1891, Pirovano, 1905).
  - G-IV.- Coartadas o artimañas orquestadas para conjurar y neutralizar a los oficiales leales (Córdoba, 1905).
  - G-V.- Trato de los apresados por las fuerzas revolucionarias (Mendoza, 1905)
  - G-VI.- Compromisos, mediaciones, armisticios y pactos de no beligerancia (Córdoba-Mendoza, 1905)
  - G-VII.- Resistencia de sublevados a la represalia pretoriana o contra-revolucionaria (Mendoza, 1905).
  - G-VIII.- El efecto dominó en las insurrecciones cívico-militares.
  - G-IX.- Conclusiones.

### **Palabras Claves**

Abstencionismo armado--Coartadas o artimañas burocráticas--Estrategias y tácticas insurreccionales--fuerzas revolucionarias--Mediaciones religiosas--Regimientos de

conscriptos--represalia pretoriana o contra-revolucionaria--Resistencia de sublevados--  
Tratamiento respetuoso de prisioneros--Vulnerabilidad militar-

## **Keywords**

Armed abstentionism--Bureaucratic alibis--Military vulnerability--insurgent  
strategies—religious mediations--revolutionary forces-

## **G-. El Abstencionismo Armado y las Estrategias y Tácticas Insurreccionales.**

Habiendo analizado tanto el fenómeno del conspiracionismo cívico-militar como el frustrado proceso del Acuerdo (Roca-Mitre), nos dedicaremos ahora a desentrañar las estrategias y tácticas insurreccionales defensivas (revoluciones cívico-militares) así como sus víctimas ocultas, ocurridas a fines del siglo XIX y desestimadas por la historia oficial. La recuperación de dichas memorias ayudaría a comprender el secreto del fracaso de las conspiraciones del siglo XIX, entre las cuales, la Revolución de 1905, Rouquié (1981) considera que es la última de dicho siglo.<sup>9488</sup> Tales fracasos, que en algunos casos devinieron en sucesos trágicos (Pirovano), se habrían originado, en parte, en la violación de las leyes no escritas de la conjura revolucionaria, en las que estaba prescripto el secreto, el silencio y la absoluta anonimidad o clandestinidad de los conjurados, y el necesario compromiso o toma de conciencia política y moral de todos sus integrantes.<sup>9489</sup>

Por el contrario, el fracaso posterior de las conspiraciones revolucionarias del siglo XX, habrían obedecido al negacionismo y la tergiversación de los crímenes de lesa humanidad que se vivieron en el pasado (conquista, esclavitud, mazorca, servidumbre, pretorianismo, etc.). Dichos fracasos habrían obedecido también al desdén o menosprecio que tuvieron las estrategias ofensivas --que fueron una destrucción puramente simbólica del enemigo (L. Rozitchner, 1985)-- por una reinterpretación de las herencias o legados políticos y militares de un orden y un estado cuya arquitectura legal y cultural se había fundado en los mitos del federalismo y el crisol de razas (donde unas regiones y etnias eran superiores a otras), en la desigual combinatoria modernizadora de la educación laica, gratuita y obligatoria; el servicio militar compulsivo y nacionalizante; la pedagogía nacionalista de la Educación Patriótica; y la representación de minorías y el sufragio libre, secreto y obligatorio de la Ley Sáenz Peña. Es decir, una reinterpretación de dichos mitos, legados y pedagogías, que pudiera nutrir una identidad propia y la producción de un poder democrático y popular, que priorizara una estrategia que dividiera al aparato militar burocrático-oligárquico, y que al menos intentara equiparar su propio poder con el de la fuerza pretoriana del estado oligárquico.<sup>9490</sup>

Sin embargo, para una aproximación crítica al proceso revolucionario que hemos investigado, es preciso hacer abstracción del sectarismo y de los prejuicios de clase, y rechazar la falsa división entre revoluciones políticas y sociales. Así también es preciso rechazar la concepción vanguardista del conocimiento que sostiene la tesis de la

necesaria impostación externa de la ciencia en el seno de las clases populares.<sup>9491</sup> Asimismo, es imprescindible recuperar --del velo de silencio con que fueron ideológicamente amortajados-- las acciones y los actores represaliados de cualquier sector social o institucional que fueren, así como reinterpretar la dialéctica entre un derecho de resistencia verdaderamente excepcional invocado por los sectores democrático-populares y la perversa combinación de un estado de excepción y un poder condicionado que, al decir de Walter Benjamín, es la regla común impuesta por los factores de poder (Mate, 2003).

Este séptimo capítulo lo subdividiremos en nueve apartados, que comienzan analizando el silencio, el secreto y la abdicación en la conjura (1905), la vulnerabilidad militar de los regimientos de soldados conscriptos (Rosario, 1905), y la transformación del motín en insurrección, y de la insurrección en motín y tragedias colaterales (Corrientes, 1891, Pirovano, 1905); para más luego encarar los métodos extra-militares (coartadas, artimañas) orquestadas para conjurar y para neutralizar a los oficiales leales (Córdoba, 1905); y el trato dado a los prisioneros por las fuerzas revolucionarias (Mendoza, 1905); para cerrar finalmente estudiando la concertación de compromisos, mediaciones, armisticios y pactos de no beligerancia (Córdoba-Mendoza, 1905); las formas de resistencia de los sublevados a las represalias contra-revolucionarias (Mendoza, 1905); y el efecto dominó en las insurrecciones cívico-militares.

#### **G-I.- Silencio, secreto y abdicación en la conjura (1905).**

La militancia revolucionaria entre los oficiales del ejército no fue algo lineal ni permanente, y estuvo lleno de altibajos y controversias, y porque no también de lealtades y deslealtades. En ese sentido, si bien tanto civiles como militares arriesgaban la libertad y hasta la vida en los estallidos revolucionarios; a diferencia de los civiles, los militares arriesgaban su propia carrera, que era para la mayoría de ellos la única fuente de sus ingresos personales. Es preciso también tener en cuenta que muchos de los civiles conjurados estaban familiarizados con el manejo de armamento, pues eran o habían sido la mayoría de ellos oficiales de la Guardia Nacional.

Aparentemente ignorando las peripecias conspirativas del Coronel Benjamín Calvete [6-16-I], ocurridas en San Luis en 1904, relatadas en otro capítulo de esta obra, el Mayor Tomás Vallée (14-7-A), teniente revolucionario del 90 (donde fue herido), y también del 93, había mantenido una década más tarde, en el transcurso de 1904, varias y comprometidas sesiones conspirativas con Hipólito Irigoyen.<sup>9492</sup> En la primera de ellas, celebrada temprano en abril de 1904, Vallée le manifestó a Hipólito Irigoyen "...que consideraba mejor esperar, porque era seguro el aumento de los elementos y la disminución de la resistencia en las provincias una vez que el general Roca terminara su presidencia".<sup>9493</sup> En efecto, a diferencia del futuro presidente Quintana, el Mayor Vallée estimaba que la "legitimidad" de Roca en el seno del ejército era aún muy alta, de ahí la dificultad para reclutar nuevos conjurados. El propio Maquiavelo sostiene en sus Discursos sobre Tito Livio que la presencia del "príncipe" puede "...encontrarse investida de tanto poder, autoridad y reputación, lo que llega a espantar y amedrentar a cualquier conjurado".<sup>9494</sup>

Cuatro meses después, a fines de agosto de 1904, y encontrándose destinado en Córdoba, bajo el mando del Coronel Daniel Fernández, Vallée manifestó que fueron notificados del pronunciamiento, para el cual estaban listos, pero que era preferible no

programarlo entre el 5 y el 15 de septiembre, pues con motivo de la incorporación de los conscriptos iba a ser muy difícil hallar en sus respectivos destinos a los oficiales conjurados, que estarían comisionados en la campaña para la recepción de los contingentes de reclutas.<sup>9495</sup> Pocos días después, con gran sorpresa de Fernández y del propio Vallée, ambos reciben la orden impartida desde la Junta Revolucionaria del Radicalismo de pronunciarse en la madrugada del 10 de septiembre.<sup>9496</sup> Pero recién horas antes del estallido, reciben la contraorden telegráfica de suspensión.<sup>9497</sup> Posteriormente, Vallée recibe de dicha Junta la orden de tratar de permanecer en Córdoba pues el pronunciamiento había sido diferido para el mes de Octubre, sin fecha precisa definida. Más habiendo sido trasladado con destino a la Escuela Superior de Guerra, una vez en Buenos Aires fue de comisión al Alto Uruguay, donde se enteró de que los camaradas santafesinos más jóvenes (probablemente el Capitán Pedro N. Zeballos y el Mayor Doralio Hermosid [12-39-I]) estaban disgustados con su persona. Le atribuían a Vallée los pedidos de reiterada postergación del estallido, que ellos a duras penas habían logrado convenir.<sup>9498</sup> A propósito de este caso, Maquiavelo advierte en el trabajo citado que cualquier "...dilación, postergación y aplazamiento pueden aumentar los peligros y riesgos de fracaso".<sup>9499</sup>

Indignado con las acusaciones que anónimamente circulaban, Vallée se entrevistó de inmediato con Yrigoyen y le planteó que habiendo perdido él "...la confianza en su lealtad y prudencia lo considerara como definitivamente separado".<sup>9500</sup> Vallée esgrimía como causal de la separación la imprudencia que significaba revelar su compromiso revolucionario a otros camaradas. En las leyes no escritas de la conjura revolucionaria estaban prescriptos el secreto, el silencio y la absoluta clandestinidad y tabicamiento de los conjurados.<sup>9501</sup> ¿Era esta una causal o una excusa para liberarse de un compromiso que el fino olfato de Vallée presentía que debía culminar en fracaso? ¿Era consciente Vallée que la tropa bisoña del Servicio Militar Obligatorio era muy distinta a la tropa veterana y voluntaria a la que él estuvo avezado durante las revoluciones de 1890 y 1893?

Tratando de justificar el abuso que había hecho de su nombre, Yrigoyen le manifestó a Vallée que los oficiales de Salta, Mendoza y Bahía Blanca le habían pedido la postergación por los inconvenientes que aparejaba la fecha elegida del 10 de septiembre, dada la incorporación del contingente anual, y que había usado su nombre porque consideraba que era una garantía para convencer a los correligionarios de Santa Fe, que se obstinaban en precipitar los acontecimientos revolucionarios antes del cambio de gobierno, es decir durante la presidencia de Roca. Lo había hecho así, porque según lo confiesa Yrigoyen "...yo era su mejor amigo y creía que podía disponer de mí".<sup>9502</sup> Emocionado y deprimido, Yrigoyen le pidió suspendiera la entrevista hasta el día siguiente. Vallée había sido, vale recordar, su padrino de duelo en el sangriento lance de honor que mantuvo con Lisandro de la Torre en San Fernando, el 6 de septiembre de 1897, cuando se dirimía la sucesión del liderazgo de la Unión Cívica Radical, acéfala desde el año anterior con motivo del suicidio de Leandro Alem.<sup>9503</sup> En la nueva conferencia, Vallée se encerró en su negativa y le vaticinó a Yrigoyen el fracaso de la conspiración.<sup>9504</sup> Al despedirse, Yrigoyen le pidió que "...si no iba a estar con nosotros, le prometiera que al menos que no va a estar en contra".<sup>9505</sup>

Dos días después de la conferencia con Yrigoyen, el Fiscal y dirigente radical Julio Moreno le solicitó en nombre de Yrigoyen "...que no hiciese trabajos en su contra y que no divulgara su separación".<sup>9506</sup> La conducción del Radicalismo --que a diferencia de la

Revolución de 1893 carecía en 1905 de un jefe militar-- estaba temerosa que el abandono del compromiso conspirativo de Vallée produjera en las filas revolucionarias un efecto dominó. Si bien Yrigoyen conducía todos los hilos de la conspiración, pues era el único que conocía al dedillo a todos los conjurados, Vallée también contaba con muchísimos camaradas que lo respetaban y seguían. Vallée le contestó a Moreno que "...consideraba una indignidad servirme de los secretos de la conspiración, conocidos en forma tan especial, para contraminarlos y que, en cuanto a lo segundo, esperaría los acontecimientos sin hacer de mi parte nada por divulgar mi alejamiento".<sup>9507</sup>

Hasta el mes de diciembre de 1904, en que por ordenes superiores marchó con la Escuela Superior de Guerra a la frontera del Alto Uruguay, Vallée reconoció que habló de su separación con sólo seis jefes y oficiales, que deben haber sido el Mayor Adolfo Benavídez (14-12-I), los Capitanes Angel Herran o Herranz (18-23-C) y Antonio López (18-34-I), y el Teniente Benedicto Ruzo (22-3-A).<sup>9508</sup> En la forma afectuosa con que dichos oficiales se habían interesado "...por conocer la verdad, hube de manifestárselas. Rehuí deliberadamente explicaciones de causa, pero a algunos de ellos que me preguntaron si podrían separarse también, les contesté que sí, haciendo uso del mismo derecho que yo tuve para hacerlo".<sup>9509</sup>

Estas conversaciones pudieron haberse prestado a la sospecha de haber cometido una suerte de delación, pues sin duda estos oficiales deben haber a su vez difundido entre sus camaradas amigos lo que escucharon de boca de Vallée.<sup>9510</sup> Es muy posible, entonces, que las negativas a participar, tanto del Teniente Coronel José M. Castro Sundblad (10-10-I), al frente del Regimiento 2o de Infantería en Bahía Blanca, como la del Mayor Rosendo Hermelo (17-6-A) y el Teniente Etelredo Nicolás Berizzo (21-24-A) al frente del Regimiento 3º de Artillería en Santa Fe, hayan obedecido al conocimiento anticipado que tenían de la confesa defección del Mayor Vallée. Todo ello, sin duda, debe haber contribuido para que las relaciones entre los Radicales y los militares, a posteriori del frustrado evento, se deterioraran profundamente.<sup>9511</sup> Sin embargo, para Rock (1992), el evento insurgente sirvió para "...recordarle a la oligarquía que el Radicalismo no estaba muerto".<sup>9512</sup> Todos los gobiernos que se sucedieron (Figuroa Alcorta, Sáenz Peña), según Rock, se "...vieron asaltados constantemente por el temor de que los Radicales se sublevaran nuevamente".<sup>9513</sup> Yrigoyen, a pesar de la apostasía del Mayor Vallée y del fantasma de Pirovano, que deben haberlo hecho reflexionar sobre sus tácticas y estrategias militares, seguía conspirando noche y día. Hasta se ha llegado a sostener que la amenaza, falsa o cierta, de una nueva sublevación cívico-militar, durante los festejos del Centenario, fue lo que precipitó la sanción de la Ley Sáenz Peña.<sup>9514</sup>

Luego de derrotada la revolución de 1905, y para colmo de su indignación, Vallée se enteró que Yrigoyen había atribuido el abandono de su compromiso conspirativo a su noviazgo con una "moza", sobrina de Carlos Pellegrini, que a la postre resultó ser su mujer.<sup>9515</sup> No obstante, fracasada la revolución, la cual a diferencia de la Revolución de 1893 estuvo impulsada mayoritariamente por oficiales subalternos, las sospechas hacia la actitud de Vallée entre los oficiales radicales (Álvarez Pereyra, Arroyo, Aranzadi, Dellepiane, Grosso Soto, Lescano, Marcilese, Serrato, Valotta) se acentuó por cuanto un año después del fracaso revolucionario, en 1906, durante la gestión del General Luis María Campos (fundador de la Escuela Superior de Guerra), Vallée había aceptado un alto cargo en la Secretaría del Ministerio, que le valió por cierto como antecedente para

su posterior ascenso a coronel en 1909 y a general en 1913.<sup>9516</sup> De haber participado de la rebelión de seguro no habría sido promovido a la más alta jerarquía castrense.

Finalmente, cuando Yrigoyen asumió la presidencia en 1916, Vallée quedó sin destino y cuando tuvo que ascender a general de división fue postergado en beneficio del General José Félix Uriburu, al extremo que tuvo que solicitar su retiro del ejército, motivo por el cual dio a conocer en carta abierta sus pasadas desavenencias con el Presidente Yrigoyen, que luego fueron publicadas en forma de libro.<sup>9517</sup> Dicha carta, le significó a su autor que el Ministro de Guerra Julio Moreno rectificara sus dichos por la prensa, solicitara transitoriamente la renuncia, y lo retara a duelo; lance éste que se verificó, y donde Vallée tiró adrede al suelo (actitud ésta que no se registró en el acta).<sup>9518</sup>

### G-III.- Vulnerabilidad militar de los Regimientos de conscriptos (Rosario, 1905)

La Ley del Servicio Militar Obligatorio (Ley 4031 de 1901), concebida entre otros motivos para ahorrarle al Tesoro la cuota de enganche, que había sido caracterizada por el Diputado Mariano Demaría como antesala del sufragio universal, fue combatida acerbamente por el liberal diario *La Prensa* y el periodismo de izquierda (*La Vanguardia* y *La Protesta*) por alimentar la denominada estrategia de Paz Armada.<sup>9519</sup> También fue combatida en la Cámara de Diputados por el General Alberto Capdevila, quien aducía que dicho proyecto no hacía otra cosa que reproducir las ideas del general francés Louis Trochu (1879), elaboradas a partir de la derrota de Sedan y de la traición de Thiers (1870).<sup>9520</sup> Las teorías de Trochu, a juicio del actualizado parecer de Capdevila, no hacían caso a las más modernas apreciaciones del Coronel George Henderson, a propósito de la guerra Boer en Sud-África.<sup>9521</sup>

Los reclutas o conscriptos habían venido a sustituir a los soldados voluntarios, contratados (enganchados) y destinados (desertores y fugados); y con ese traspaso a manos de soldados novatos los regimientos se habrían vuelto más vulnerables perdiendo experiencia y vigor militar, al extremo de quedar sujetos a la eventualidad de insurrecciones cívico-militares y a los ataques indígenas.<sup>9522</sup> Si a ello agregamos que la oportunidad cronológica elegida por la Junta Revolucionaria, la del mes de febrero de 1905, al coincidir con una tropa bisoña reclutada cinco meses antes, en septiembre de 1904, hacía que el éxito militar de la insurrección fuera más factible. Cuatro años después de promulgada dicha ley de servicio militar, en febrero de 1905, con los conscriptos recién incorporados, y con la clase anterior ya licenciada, los cuerpos estaban prácticamente huérfanos de instructores, pues aún no se había refundado la Escuela de Suboficiales.

Las unidades militares, como en el caso del Batallón 9 de Infantería de Línea con asiento en Puerto San Martín, en las afueras de Rosario, próximo al pueblo de San Lorenzo (Santa Fe), estaban expuestas durante dicho evento revolucionario a cualquier sorpresa o aventura político-militar.<sup>9523</sup> Su Jefe, el incauto o sorprendido Teniente Coronel Juan A. Covaro [12-38-I], que integraba las filas del gobierno, relata como le hurtaron su propio regimiento, temeraria maniobra que no hubiera sido posible con soldados voluntarios, enganchados o destinados, pues "...ya la tropa (unos 50 o 60 hombres) había salido en formación con todo sigilo, al mando del sublevado Capitán Pedro N. Zeballos [AGE-Leg.14.120], de los Tenientes primeros Samuel Castro [21-8-I] y Ricardo Fernández Rojas [21-56-I], y de los Subteniente Juan J. Poclava [AGE-

Leg.10.242], Emiliano Lescano [AGE-Leg.6861] y Guillermo Anacleto Terán [27-29-I], y acompañándolos también el Ayudante de Esgrima Julián Rodríguez Varela”.<sup>9524</sup> Desde ahí se le informa al Teniente Coronel Covaro que la tropa de su regimiento marchó hacia los alrededores del Regimiento 3 de Artillería, acantonado en San Lorenzo (Santa Fe), “...hasta la mañana siguiente que los embarcaron en un tren con rumbo al Rosario”.<sup>9525</sup> El 3 de Artillería, y sus jefes el Mayor Rosendo Hermelo (17-6-A) y el Teniente Etelredo Nicolás Berizzo (21-24-A), unos de los que habían conversado con el Mayor Tomás Vallée, habían sido a su vez apresados por un grupo de Radicales constituido por Ricardo Núñez, Rodolfo Sívori, José Bacigalupo, Bernabé Luna, Agustín Ramírez, Primitivo Aguirre, y Luis Portalupi.<sup>9526</sup>

Sin poder precisar la forma como se desarrollaron las acciones entre la fuerzas del ejército y las de la policía del Rosario, ni el número de éstas, las averiguaciones que ligeramente hizo el T.C. Covaro, “...son que si bien el combate ha durado unas horas, me encuentro con que tomado el promedio de munición gastado cada hombre no había disparado mas de 100 cartuchos. Tampoco me sería posible aseverar con exactitud el número de plazas que marcharon con los oficiales sublevados dado el poco efectivo con que se encontraba”.<sup>9527</sup> El Teniente Coronel Covaro estaba convencido, “...que la tropa no solamente no ha estado sublevada, pues en ese caso se hubiera dispersado al aconsejárselo los oficiales [insurrectos] cuando cobardemente los abandonó, sino que, lejos de eso en la acción misma hay muchos que no hacían fuego pues empezaron a desconfiar de que se trataba de una traición de los oficiales, que momentáneamente los mandaban”.<sup>9528</sup>

Y a propósito de la falta de vigor militar que con la Ley del Servicio Militar ostentan los conscriptos, el general Fotheringham se lamenta, y añora con nostalgia a los antiguos soldados voluntarios, enganchados o destinados, coincidiendo en esta apreciación con los dichos del General Alberto Capdevila, en oportunidad de su debate con el Ministro de Guerra Riccheri. En ese sentido, Fotheringham sostiene “...que no tenemos lo que antes llamábamos Infantería de Línea. No aguantan los conscriptos de seis meses, ni los de dos años marchas forzadas. Y la escasez de clases [cabos, sargentos], tremenda! Cansándose varios en una marcha de apenas dos leguas! Y al llegar creyendo tener el enemigo al frente, mas bien un montón de hombres y no soldados conscriptos instruidos y ordenados. Sería largo detallar pero el régimen es este: No son soldados de aquellos tiempos”.<sup>9529</sup>

#### **G-IV.- Transformación del motín en insurrección, y de la insurrección en motín y su desencadenamiento en tragedia (Corrientes, 1891, Pirovano, 1905).**

La caracterización de las revoluciones cívico-militares es una operación delicada por cuanto la frontera conceptual entre la insurrección y el motín es muy estrecha y sensible. En el pasado histórico argentino y latinoamericano, numerosas unidades militares que participaron en insurrecciones terminaron amotinadas.<sup>9530</sup> Y viceversa, hubo también acontecimientos que habiendo comenzado como motines o chirinadas culminaron por el efecto de contagio como insurrecciones.

Sin ir más lejos, el motín del 1º de enero de 1809, en Buenos Aires, fue uno de los factores militares que desencadenó al año siguiente la Revolución de Mayo; y el célebre Ejército del Norte acabó su gloriosa trayectoria de la emancipación cuando se amotinó en 1819, suceso que se conoció como el Motín de Arequito (Santa Fe).<sup>9531</sup> Y medio

siglo más tarde, en julio de 1891, en Corrientes, al desdoblarse el batallón provincial entre dos fuerzas antagónicas, discriminando políticamente la liquidación de los sueldos, donde al batallón leal se le pagaba puntualmente, pero al Batallón “Corrientes” se le adeudaban numerosos meses, se gestó finalmente un sangriento motín o chirinada, que fue reprimido con las tropas del Chaco austral.<sup>9532</sup> Con las secuelas de este motín y su sangrienta represión, un año después, en diciembre de 1892, cuando recién había asumido el presidente Luis Sáenz Peña, estalló una insurrección de signo liberal a la que el Gobernador Antonio Ruiz, hizo frente con relativo éxito.<sup>9533</sup> Pero al otro año, en agosto de 1893, y conectado con este último estalló otro movimiento insurreccional, que se extendió a toda la provincia, comenzando en Saladas y continuando en Empedrado, Esquina, Goya y Bella Vista, con cargas de caballería incluidas, y culminando con una insurrección generalizada que tomó la Capital, y que fue repelida mediante la intervención federal y las tropas del Chaco central.<sup>9534</sup>

A la inversa, una década más tarde, una insurrección cívico-militar devino en un motín o chirinada de la tropa, y esta última en tragedia sangrienta. En oportunidad de la Revolución de 1905, los jóvenes cívicos de la Junta Revolucionaria Radical: Alejandro Witcomb, Valentín Vergara, y los doctores Luis Roque Gondra y Agustín Rocca, tuvieron como misión --a pedido de los oficiales del Regimientos 2º y 6º de Infantería sitos en Bahía Blanca (Villamayor, Gibelli, Guillermon y Valotta)-- impedir que el Comandante José M. Castro Sundblad, saliera como todas las mañanas de su casa para ir al regimiento, pues sus oficiales lo apreciaban y se compadecían de él por tener un hijo enfermo de tifoidea.<sup>9535</sup> La misión fracasó porque Castro Sundblad no estaba en su domicilio. Pero sus regimientos, compuestos de tropas bisoñas, fueron igualmente sublevados y embarcados (un total de 200 soldados acompañados con bandas de música) en un tren para marchar a la Capital a incorporarse a los revolucionarios que supuestamente iban a copar el Arsenal de Guerra. Luego de una lenta marcha de 300 kilómetros --habían entrado previamente en los pueblos de Puán y Carhué viviendo a la revolución-- colmada de sabotajes y contramarchas, recalaron finalmente en la estación Pirovano (Bolívar, Pcia. de Buenos Aires), a 400 kilómetros de Buenos Aires.<sup>9536</sup> La tropa venía descontenta, por cuanto los oficiales “...se habían opuesto abiertamente a permitir diversos atropellos que intentaron y algunos saqueos que lograron realizar a pesar de todo”.<sup>9537</sup>

Para ese entonces, la revolución en Buenos Aires había depuesto las armas, y la tropa del 2 y el 6 de Infantería de Bahía Blanca, cansada y hambreada, fue acantonada en el tinglado de dicha estación, desde donde se elevó una propuesta de rendición al Coronel Federico Zeballos (5-9-I), que se encontraba en la estación Juan F. Ibarra, más próxima a San Carlos de Bolívar, con tropas mucho más numerosas. En esa oportunidad se había tomado conciencia de la desertión de los Tenientes Enrique Gibelli (AGE-Leg.5317) y Horacio Guillermon (AGE-Leg.5869) que se habrían refugiado en el casco de una estancia vecina, propiedad de Saturnino Unzué.<sup>9538</sup> Infructuosamente el Teniente Guillermo Valotta (21-126-I) intentó recuperar a dichos oficiales desertores y lo mismo pretendió el Mayor Aníbal Villamayor (AGE-Leg.272 y 13.789), con la diferencia que este último y algunos oficiales que también le acompañaron terminaron desertando, “...marchando en dirección hacia Daireaux, donde algunos oficiales cambiaron sus uniformes por trajes civiles que consiguieron allí, para proseguir la marcha hacia Lobos”.<sup>9539</sup> Al intentar entonces los Tenientes Avelino Montero (22-12-I) e Hipólito Verniard (24-24-I) desarmar a la tropa, estalló un grito de ¡Viva la Patria! emitido por un sargento llamado Sinécio Heredia y enseguida se desató un intenso tiroteo que acabó

con la vida de ambos oficiales.<sup>9540</sup> Pareciera ser que un par de sargentos y un cabo, para congraciarse con las autoridades militares leales y evitar ser sometidos al eventual Consejo de Guerra, se confabularon para simular que habían sido engañados con el pretexto de ir a reprimir una huelga ferroviaria, y que una vez que tomaron conciencia del supuesto embuste habían encarado en combate a los civiles de la Junta Revolucionaria con el resultado conocido.<sup>9541</sup>

Como corolario, el motín de la soldadesca produjo la inmediata dispersión de los que se hallaban en la estación, pues quedarse equivalía a morir. Así fue como Alejandro Witcomb y Valentín Vergara huyeron, y Luis Roque Gondra cargó con un herido de apellido Montes de Oca. Como bien sostiene Miller (2005), "...el pánico de un solo soldado puede provocar el pánico de toda una compañía".<sup>9542</sup> Aquellos que no lo comprendieron así, expresa crudamente Gondra --que eran los ingenuos integrantes de la Junta Revolucionaria: Dr. Agustín Rocca, Ing. Germán Kuhr, Cornelio Baca, Inocencio Arroyo y Julio Moreno-- fueron inmisericordemente asesinados por la soldadesca sublevada y por algunos miembros de las clases (sargentos, cabos).<sup>9543</sup>

Cuando se instruyó el sumario y el proceso judicial en Mercedes (Pcia. de Buenos Aires), frente a la obstinación de las autoridades militares para no entregar los soldados acusados los letrados radicales debieron destruir las coartadas que dichas autoridades habían urdido para salvar a los inculpadados del crimen y a los oficiales desertores, que terminaron presos en la cárcel militar de Usuahia (Tierra del Fuego).<sup>9544</sup> Gondra (1945) concluye con la dolorosa comprobación de la ineptitud militar del comando revolucionario, pues si alguien "...nos hubiera dado una enérgica voz de mando, nos habríamos atrincherado en la estación y hubiéramos repelido el ataque de la soldadesca, dando tiempo a que llegaran las tropas leales al gobierno".<sup>9545</sup> Pero esa voz de mando no se dio, porque el jefe revolucionario Aníbal Villamayor "...había desertado, y no hubo ningún otro capaz de reemplazarlo".<sup>9546</sup>

Este cruento episodio, dejó en el espíritu del entonces militante radical Luis Roque Gondra, una honda impresión y la enseñanza de que "...todo motín militar transforma los jefes sublevados en bandidos, que sus compinches inferiores obedecen, no por los atributos de las charreteras que se llevan en los hombros, sino por otros [atributos] que van ocultos y a veces no se tienen a pesar de las charreteras".<sup>9547</sup>

#### **G-V.- Coartadas o artimañas orquestadas para conjurar y para neutralizar a los oficiales leales (Córdoba, 1905).**

La vulnerabilidad de los regimientos de conscriptos se prestaba a toda suerte de coartadas o artimañas con las cuales se lograba aislar a los oficiales leales, considerados más peligrosos para el éxito de los proyectos insurreccionales. En oportunidad de la revolución del 4 de febrero de 1905, en Bahía Blanca, la Junta Revolucionaria había designado a cuatro civiles: para impedir que saliera de su casa el Comandante del Regimiento 2º de Infantería Teniente Coronel José M. Castro Sundblad.<sup>9548</sup> Castro Sundblad (10-10-I) había sido uno de los más conspicuos líderes de la Revolución del 90 y había participado también de la Revolución de 1893, pero en esta oportunidad, o bien porque ya hacía tiempo que había sido seducido por el influjo del germanismo, que abrevó en las aulas de la Escuela Superior de Guerra, o bien porque supo del fracaso conspirativo del Coronel Benjamín Calvete ocurrido en septiembre de 1904 en San

Luis, o bien porque estaba al tanto del abandono conspirativo del Mayor Tomás Vallée (14-7-A), o bien porque dudaba de la capacidad insurreccional de un ejército de conscriptos, decidió negar su concurso a la conjura.

En Mendoza, donde la revolución fue programada también para combatir al régimen oligárquico del gobernador Carlos Galigniana Segura, los conspiradores optaron por una invitación colectiva a una recepción festiva privada en casa del Subteniente Emilio Quellet (25-6-A), originario de Santa Fe.<sup>9549</sup> El Comandante Pastor Marambio y casi una docena de oficiales considerados imposibles de ser ganados para la conspiración, estaban "...en un baile que con premeditaciones previas se les había brindado los astutos Oficiales y particulares que meditaban el golpe- Y allí los tomaron presos, entre estos el [Teniente 2º] José Villarroel. Organizada la defensa, trajeron el ataque los sublevados después de la caída de la Policía, Cárcel y Casa de Gobierno".<sup>9550</sup>

Y en Córdoba, en ocasión de la revolución de 1905, el Mayor Mauricio N. Solá tuvo que refutar el testimonio del Teniente Coronel Ranulfo Ferreyra de la Cruz --que lo acusaba de haber estado entre los oficiales revolucionarios que lo detuvieron-- declarando que a la madrugada del día sábado 4 de febrero de 1905 (siendo próximamente las 4 y 35 a.m.) se encontraba "...durmiendo en su alojamiento ubicado en una casa particular que se comunicaba por los fondos con el cuartel y en la cual estaban instalados además la Mayoría, Comedor y alojamiento de algunos de los oficiales, la comunicación con las demás reparticiones del cuartel se hacía por una puerta que se había abierto al efecto".<sup>9551</sup> A la hora indicada, Solá sintió "...unas detonaciones de arma de fuego que le despertaron, y deseando investigar lo que ocurría llamó a un imaginaria que se colocaba todas las noches en el pasadizo de la casa, y que lo era un recluta de nombre Ángel Fernández, el que no pudo acudir al llamado porque en la puerta de acceso habían puesto una cadena en las agarraderas que la dejaban condenada [clausurada] y como la casa en que dormía era de alto quedé incomunicado en el primer momento sin poder salir".<sup>9552</sup> En ese instante, el trompa Isidro Carvajal "...llegó al otro lado de la puerta de comunicación con el cuartel la que también estaba condenada, le grité que con un hacha hiciera saltar los candados, lo que se efectuó, pudiendo el que suscribe bajar al primer piso por medio de una escalera colocada sobre una mesa trasladándose inmediatamente al cuartel por los fondos; no encontrando a nadie en este sitio".<sup>9553</sup> Según lo manifestó el referido Carvajal, el Batallón había sido "...sacado como a las 3 y 45 a.m. por [los revolucionarios] el Capitán Don [Tomás] Aurelio Figueroa (16-8-I) y Subteniente Don Alejo Belaúnde que estaban de comandante de cuartel y oficial de guardia respectivamente. La cadena a que me refiero está en poder del Teniente 1º Don Julio Ruiz Moreno".<sup>9554</sup>

Como el Mayor Solá no encontraba a nadie, y estando el cuartel "...completamente a oscuras traté de salir a la calle donde fui sorprendido por un grupo como de 50 o 60 revolucionarios armados a máuser que al mando del Ing. Justiniano Torres me rodearon dándome orden de prisión, la que acaté en la imposibilidad de resistirla".<sup>9555</sup> En este sitio lo tuvieron a Solá hasta que "...llegó el día en que me condujeron a la Policía donde se encontraban las fuerzas revolucionarias que ya habían derrocado al Gobierno de la Provincia, y a fin de que esta no se enterase de mi prisión y no me viera, rompieron el tablero de una puerta para introducirme de una manera oculta".<sup>9556</sup> Ya dentro del Cabildo, lo pusieron a Solá "...incomunicado con dos centinelas de vista (ciudadanos) en el despacho del Gobernador donde permanecí solo hasta un poco más tarde en que fueron traídos al mismo sitio y en las mismas condiciones, [los oficialistas]

el comandante [Arnulfo] Ferreira de la Cruz, mayores [Octaviano] Navarro Ocampo y Angel Alais, Jefe del 8 el primero y 2º Jefe del 1º de Artillería de campaña y de Ingenieros Telegrafistas los otros dos”.<sup>9557</sup>

En esta situación de incomunicado, Solá permaneció “...hasta la llegada del Jefe de la Región General Don Lorenzo Wintter que tomó el mando de la División del Litoral, en estas circunstancias la tropa sublevada del Batallón 8 de Infantería no se hallaba en la ciudad porque había marchado desde el primer momento a Villa María [Córdoba]”.<sup>9558</sup> Después de la llegada del Sr. Comandante de la Región “...y por orden de él fui constituido en detención hasta ser juzgado por Consejo de Guerra Especial, ante el cual el suscrito ha respondido de su aptitud y conducta en esas emergencias. Como el fallo de este Consejo es todos conocido no entro a considerarlo y bástame recordar el fallo en última instancia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el cual se me absolvió con la declaración expresa de que la causa no afectaba mi buen nombre y honor; fallo que para mayor claridad transcribo a continuación”.<sup>9559</sup>

A fin de evitar repeticiones en la narración de los hechos, el ex revolucionario Ing. Civil Justiniano Torres principió por indicar la forma y disposiciones del cuartel o antigua Cárcel de detenidos, con frente a la Avenida Vélez Sársfield, que se trataría de “...un corralón, unido al anterior por los fondos y comunicado por una puerta, con salida a la calle Trejo y Sanabria, y una casa de dos pisos también unida al corralón por una puerta....ad-hoc como la anterior”.<sup>9560</sup> En esta última casa “...habitaban los oficiales en el piso bajo y el mayor Solá en el alto, como se trata de casas de alquiler no hay escalera interior que comunique los dos pisos y la casa alto solo tiene salida al exterior por la puerta de calle que da al Boulevard San Juan”.<sup>9561</sup>

A renglón seguido, el Ing. Torres declaró que en la madrugada del 4 de febrero estaba el Mayor Solá de servicio en el 8 de Infantería, como Jefe de Cuartel el Capitán Tomás Aurelio Figueroa y como oficial de guardia el Sub-Teniente Julio A. Belaúnde, a la hora “...se presentó el Capitán del mismo Cuerpo Don Julio A. Costa [no confundir con el homónimo Gobernador de Buenos Aires] designado por Gobierno revolucionario Jefe del 8 de Infantería y que había venido de Santiago del Estero dos días antes y se encontraba alojado en un hotel”.<sup>9562</sup> El capitán Figueroa hizo entrega del cuerpo, “...pasando a tomar el mando del Batallón de Ferro-carrileros también sublevado”.<sup>9563</sup> Inmediatamente se procedió a “...cerrar y atrancar solidamente la puerta de comunicación entre el Cuartel y la casa ocupada por los Sres. Oficiales que a esa hora ya estaban durmiendo, también se ató la puerta de calle de la casa del Mayor Solá con una cadena sólida y un candado, para lo cual se aprovechó de las manijas”.<sup>9564</sup> De esta peculiar manera, tanto el Mayor Solá como los oficiales no comprometidos en la rebelión, quedaron “...en la absoluta imposibilidad de pasar al Cuartel a menos de romper una de las puertas (interior o de calle) operación muy difícil, por ser ambas bastante sólidas y además como se abren hacia adentro su resistencia en contra del marco es enorme”.<sup>9565</sup> Momentos mas tarde se presentó al Cuartel el Comandante Daniel Fernández, Jefe del Movimiento: acompañado de su escolta y dio orden de atacar la Policía, el Batallón salió a cargo del Capitán Costa, serian las 3 y 20 o 3 ½”.<sup>9566</sup>

Por haber estado prevenida la policía, no les fue posible a los insurrectos tomar el cuartel en forma inmediata. Debido a esa razón el insurrecto Comandante Fernández “...resolvió dirigir personalmente el ataque para lo cual se trasladó a la plaza San Martín, [donde fue] herido gravemente por un casco de granada, dejando a cargo del

cuartel al Mayor Solá con un grupo de particulares”.<sup>9567</sup> En ese momento, fue cuando finalmente el Mayor Solá consiguió “...salir de su casa (hasta la fecha no he sabido como) y marchó al cuartel por la comunicación interior, en las proximidades de la puerta fue hecho prisionero, y permaneció allí hasta que por orden superior lo remití a la policía custodiado por un grupo de ciudadanos”.<sup>9568</sup> El Mayor Solá no tubo “...ni tiempo ni oportunidad de resistir, fue sorprendido al llegar a la puerta, pues el cuartel estaba oscuro, y además el número de ciudadanos armados (40 o 50) no le dejaban ni la más remota esperanza de salir airoso, suponiendo hubiera tenido la insensatez de pretender resistirse, lo que por otra parte era absolutamente inútil pues hacia una hora que el Batallón estaba fuera”.<sup>9569</sup>

Los oficiales insurrectos respetaban a Solá por su reconocido liderazgo sobre la tropa, y por ello extremaron los recaudos para evitar una situación de violencia. El Ing. Torres, creía de su deber agregar “...que por iniciativa de los oficiales comprometidos se tomaron todas esas precauciones que hicieron imposible la presencia de Solá en el Cuartel, pues ellos conceptuaban imposible la sublevación si era sentido por Solá, por su ascendiente sobre la tropa, o cuando menos, nos obligaría a matarlo pues era capaz de sacrificarse en el cumplimiento de lo que el entendía su deber. Por lo demás, en la difícil situación en que se encontraba, conservó en todo momento su entereza y dignidad”.<sup>9570</sup>

Estas contradicciones, que se suscitaron acerca del comportamiento de diversos oficiales en los acontecimientos que se produjeron el 4 de febrero de 1905 en Córdoba dieron lugar a una serie de testimonios ante el **Tribunal de Clasificación de Servicios Militares**. Es por ello que, en atención a los perjuicios que el Mayor Mauricio N Solá vino soportando en su carrera, por las dudas despertadas con respecto a su actuación como 2º Jefe del 1er Batallón del Regimiento 8 de Infantería de Línea, tuvo necesidad de efectuar numerosos descargos.<sup>9571</sup>

#### **G-VI.- Trato de los apresados por las Fuerzas Revolucionarias (Mendoza, 1905)**

Con respecto a la insurrección Radical de 1905, ocurrida en Mendoza, el oficialista Jefe de Estado Mayor de la Región Militar de Cuyo Teniente Coronel Pastor Marambio relata en un pormenorizado Informe, fechado tres años después, el 12 de Octubre de 1908, en San Martín (Mendoza), que “...serían próximamente las 3 de la mañana del día 4 de febrero de 1905, cuando fui despertado, estando en mi domicilio de Suipacha, entre Espejo y Sarmiento, por las detonaciones múltiples e intermitentes de armas de fuego que partían al parecer, de la dirección del Cuartel del 2 de Cazadores, unas tres cuadras de mi casa”.<sup>9572</sup>

No obstante no tener como Jefe de Estado Mayor mando directo de las tropas, el oficialista Tte. Cnel. Marambio se levantó de la cama, y salió “...en el menor tiempo posible, unos diez minutos, y me dirigí al cuartel del 2 de Cazadores, porque entendí que en ese caso me llamaba allí el honor y el deber militar”.<sup>9573</sup> Al llegar al Hotel Club, a una cuadra y media de su casa y frente al cuartel del 2 de Cazadores, Marambio se detuvo al quien vive de un cantón, siendo rodeado simultáneamente por un grupo de ciudadanos insurrectos mandados por el Teniente Carlos Ramón Coello [32-3-A], quien le intimó rendición, “...diciéndome que no se explicaba mi presencia allí, que había estallado una revolución nacional, que todo el ejército estaba sublevado, que el 2 de Cazadores había salido con la orden de atacar a la Policía, de cuya triste realidad no

tuve duda al oír, en ese momento, nutridas descargas de fusilería”.<sup>9574</sup> Coello le dijo asimismo “...que el 1 de Artillería de Montaña venía en marcha, también sublevado con la orden de atacar igualmente a la Policía, que su Jefe el Comandante [Manuel] Amaya había sido tomado prisionero en el cuartel, que el 4 de Infantería y 2 de Montaña marchaban por F. C. de San Juan sobre Mendoza y que el 1 de Caballería había salido, en la tarde anterior, del Melocotón, que ya el Depósito de Armas de Mendoza había sido tomado y que era inútil toda resistencia”.<sup>9575</sup>

Marambio comprendió que, “...rodeado como estaba, imposibilitado de usar mis armas, toda resistencia en tales circunstancias era imposible y estéril. Me condujeron al interior del Hotel Club, vi allí al [oficialista] Teniente José Villarroel del 2 de Cazadores que vestía de civil y supe después que, aprovechando la confusión que se produjo con mis protestas al ser tomado prisionero, se había escapado”.<sup>9576</sup> Villarroel había sido tomado prisionero en oportunidad de un baile “...a que fueron invitados todos los oficiales que no estaban comprometidos en la revolución. Estaban asimismo detenidos en ese cantón, el Capitán Schreiber, Teniente Manuel Abelardo Segura [26-13-A], Alférez Manuel Bermejo [27-58-A] y otros, además varios ciudadanos de representación social”.<sup>9577</sup>

Aproximadamente un cuarto de hora después, también fueron detenidos los oficiales leales Mayores José Fernández de Castro, Juan Crovetto y Amador Molina, pertenecientes a la Comandancia de la Región, que “...habían sido también despertados por los tiros”.<sup>9578</sup> Estos oficiales se presentaron en el domicilio del Tte. Cnel. Marambio, a pedir órdenes. La señora de Marambio “...les dijo que yo estaba en el Cuartel del 2 de Cazadores, habiéndose dirigido a este punto, por el camino más corto, que era el seguido por mí, fueron también tomados prisioneros por el citado cantón”.<sup>9579</sup>

Desde el amanecer, este cantón había empezado “...a tirotearse con los pocos soldados que regresaron al cuartel del 2 de Cazadores y que mandaba el hoy Capitán Don Basilio Pretiñe”.<sup>9580</sup> Se esperaba por momentos que Pertiné, “...al saber por el Teniente José Villarroel que en el Hotel Club estábamos prisioneros varios jefes y oficiales se resolviera llevar un ataque para libertarnos, lo que no hizo seguramente porque sus fuerzas eran muy reducidas con relación a las de dicho cantón”.<sup>9581</sup>

#### **G-VII.- Compromisos, mediaciones, armisticios y pactos de no beligerancia (Córdoba-Mendoza, 1905)**

Los capellanes o vicarios castrenses tuvieron una fuerte presencia tanto en la conquista del desierto como en los enfrentamientos armados cívico-militares.<sup>9582</sup> En ocasión de la Revolución de 1905 en Mendoza, el Capellán Guillermo Cubler o Kubler, había actuado de mediador en el fragor de la lucha.

No obstante su rol simpatizante hacia los revolucionarios, Kubler se presentó el 7 de febrero, a la madrugada, cuando el pro-gubernamental Coronel Antonio Tiscornia se disponía a iniciar su avance, para manifestarle “...que los oficiales revolucionarios habían abandonado la tropa y se habían fugado a Chile y que los Jefes y Oficiales que habían puesto preso los revolucionarios estaban en libertad y que se ocupaban de juntar la gente a fin de evitar desorden”.<sup>9583</sup> Como el capellán Kubler le merecía entera confianza, Tiscornia ordenó “...que la tropa comiera pues hacia dos días que no lo

hacía, alimentándose únicamente con uvas y pan, a las 12 de ese día entré a Mendoza y me comuniqué con el Sr. Gral. Fotheringham”.<sup>9584</sup>

Los compromisos morales para amortiguar los costos disciplinarios en las participaciones revolucionarias o lograr las reincorporaciones eran de uso común. Las confusiones y contradicciones producidas en las declaraciones indagatorias daban lugar a todo tipo de malos entendidos. Ese fue el caso del Mayor Baldomero Álvarez, quien fue dado de baja junto con otros oficiales, el 16 de septiembre de 1893. Álvarez mal podía “...presentarse como oficial al Gral. Campos Jefe de Policía que no lo era aún”.<sup>9585</sup> Lo que ocurrió fue que el Gral. Campos lo mandó llamar a Baldomero Álvarez, recién en el mes de octubre del mismo año, cuando “...ya era Jefe de Policía, y el declarante, de baja ya, estaba convertido en ciudadano”.<sup>9586</sup> El General Manuel J. Campos, de filiación Mitrista, que había sido el jefe militar de la revolución en Julio de 1890 y jefe de la facción cívico-nacional en la provincia de Buenos Aires en Agosto de 1893, donde actuó Baldomero Álvarez, fue nombrado Jefe de Policía de la Capital Federal, como resultado de un pacto pos-revolucionario entre el Modernismo y el Mitrisismo, en reemplazo del Comandante Joaquín Montaña, recién el 23 de Septiembre del mismo año, “...vale decir mes y pico después de haberse terminado la revolución, que lo fue alrededor del 10 de agosto de ese año”.<sup>9587</sup> Que dicho general “...prometió ayudarlo para que se reincorporara al Ejército, puesto que él había sido el Jefe de la revolución. Que muchos de los que pueden atestiguar su participación activa militar revolucionaria han fallecido, pero que recuerda de los que viven, al Tte. Cnel. Franklin Rawson, Coronel Felipe Goulú, Tte. Cnel. Publio Risso Patrón [12-29-A] y Mayor Pedro A. Quiroga.”<sup>9588</sup>

Y diez años después, en el mes de Octubre de 1904, en Mendoza, se presentó en casa del Mayor Expedicionario al Desierto Amador Molina, el Capitán Miguel González, y le manifestó “...que si quería acompañarlos en un movimiento que debía estallar pronto”.<sup>9589</sup> Curtido Molina en conjuras revolucionarias, y ya no queriendo prestarse a otras nuevas cuyos jóvenes protagonistas apenas conocía, le manifestó a González (muerto luego durante la Revolución del sábado 4 de febrero en Mendoza) lo siguiente: “...yo mi amigo soy radical por convicción, no por interés, en este momento no me es posible comprometerme porque tengo un compromiso moral impuesto a mi mismo por mi Jefe y amigo el General Fotheringham”.<sup>9590</sup> Pero Molina le manifestó al Capitán González que “...nunca seré un obstáculo para cualquier cosa que Ud. quiera hacer, al contrario haré todo lo que esté de mi parte sin comprometerme y sobre todo en el puesto que desempeño que es Juez de Instrucción, les puedo servir de mucho a los oficiales que se les levanten sumarios por sospechosos como lo puede atestiguar el Capitán Pedro Y. Zeballos (hoy Coronel), Teniente Luis B. Cobarruvias, Teniente Martín González, Teniente Alfredo Correa (hoy Teniente Coronel) y muchos otros. El Capitán González se retiró manifestándome que quedaba conforme con lo manifestado por mí, y que así se lo haría saber al Sr. Coronel Irigoyen, quien era el que le había insinuado que me viera a mí”.<sup>9591</sup>

En efecto, después de estallar el movimiento del 4 de febrero de 1905, el Mayor Amador Molina reveló que prestó muchos servicios a los correligionarios heridos y emigrados, “...cuando se marcharon a Chile y supe que la esposa de mi amigo entonces Teniente Alfredo Correa estaba sola en una casa de la calle J. F. Moreno, en Mendoza, fui con el Mayor [Santiago] Vallée [18-7-A] –[quien estaba advertido por su hermano Tomás Vallée de su decisión de no participar]-- a ponerme a sus órdenes y que me

avisara cualquier cosa que le pudiera ser útil. Cuando se trató de sacar al Teniente Rodolfo Martínez del Hospital Regional para conducirlo al Hospital Central de éste, fui lo saqué acompañando del Dr. López de Gálvez su defensor en una ambulancia. Esa noche llovía torrencialmente y nos costó gran tarea evitar se mojara el enfermo, porque estaba muy grave, hasta que quedó bien instalado, todo lo hecho sin interés alguno sino por la amistad y el compañerismo”.<sup>9592</sup>

Triunfantes las revoluciones, el tratamiento de los oficiales y los soldados derrotados fue muy desigual. En el caso de los primeros, para otorgarles una suerte de libertad de movimientos, los vencedores solían pedir a los perdedores un compromiso de palabra de no ejercer beligerancia o de no agresión. Esta singular cortesía, no siempre honrada, sucedió durante la Revolución de 1905, tanto en Mendoza como en Córdoba.

En el caso de Córdoba, el Regimiento 1º de Artillería, único cuerpo que pudo resistir la insurrección, al mando del Comandante Gregorio Vélez (10-24-A), y del Comandante Pedro Toscano, una vez sobrepasados en fuerzas llegaron a un armisticio con los conjurados que derivó en la firma de “...un **compromiso de no tomar la ofensiva**”.<sup>9593</sup> No obstante ello, un oficial le comunicó en reserva al Mayor Carlos Spika, “...que el Regimiento 1º de Artillería sería nuevamente atacado por los revolucionarios pues no estaban conformes con el **pacto firmado**”.<sup>9594</sup> Por ello, Villegas y sus camaradas resolvieron “...en el acto presentarnos al Coronel [Gregorio] Vélez quien me dio el mando de una batería de seis piezas que defendía el frente del Cuartel [que ocupaba el local del antiguo Hotel de Inmigrantes]”.<sup>9595</sup> En esa situación, en que a cada instante se esperaba el ataque, “...transcurrieron los días 5 y 6 durante los cuales, en varias reuniones de jefes [Villegas] propuso diversos procedimientos para vencer la revolución, a lo que se oponía un **pacto estipulado**”.<sup>9596</sup> Tan luego como abandonaron los revolucionarios su actitud de combate, “...el Jefe de la Región ordenó hacerme cargo del cuerpo y organizarlo, para lo que procedí a juntar la tropa exigiendo que cada soldado se presentara con su respectivo armamento y equipo, haciendo requisición de las armas pertenecientes a las bajas habidas y de los fusiles excedentes en el depósito del Cuerpo”.<sup>9597</sup>

Y en el caso de Mendoza, los oficiales leales que estaban detenidos fueron “...trasladados al cuartel de Policía, a donde fue conducido también el Teniente Coronel Manuel Amaya, que fue tomado prisionero por los insurrectos en el cuartel del 1 de Montaña de que era jefe. En la Policía tuvimos el patio por prisión, hasta que habiendo tenido yo conocimiento de que el Mayor Fernández de Castro le había pedido al Doctor [José Néstor] Lencinas Jefe de la revolución, nos pusiera en libertad bajo el **compromiso de no tomar partido ni a favor ni en contra**, en los hechos que tuvieron lugar posteriormente, le hizo saber al citado jefe de la Revolución, que lo que el Mayor Fernández de Castro le había mandado decir era una broma, pues todos estábamos dispuestos a cumplir con nuestro deber en la medida que las circunstancias nos permitieran”.<sup>9598</sup> Como resultado de este nuevo mensaje, “...fuimos puestos todos en una pieza, con tres centinelas de vista, en cuya situación permanecimos hasta el día 6, en que a las ocho más o menos, el hoy Teniente Coronel Don Octavio Fernández, que había estado prisionero bajo su palabra de honor en la casa particular del Señor Gobernador de la Provincia [Carlos Galigniana Segura, sobrino de Elías Villanueva], entró en la Policía gritando que el Gobierno de la revolución había huido, produciendo confusión consiguiente en las tropas del 1 de Caballería y ciudadanos que daban la guardia, la cual obedeció maquinalmente la orden de formar que les di”.<sup>9599</sup>

De su actuación y de la de los oficiales que estuvieron prisioneros de los rebeldes, uno de los que estuvo preso, el Teniente Coronel Pastor Marambio, dio parte detallado y por escrito al Comandante de la Región Militar, el que "...en mi carácter de Jefe del Estado Mayor de la Región, fue elevado a la Superioridad para ser agregado a la documentación correspondiente a estos sucesos".<sup>9600</sup> Al hacerlo, Marambio manifestó "...que todos los oficiales que habían estado prisioneros, cumplieron con su deber, lo cual fue dado a conocer en la Orden General de la 5ª. Región, fecha 7 de febrero de 1905, cuya copia adjunto, en la parte pertinente".<sup>9601</sup>

Dados estos antecedentes oficiales, Marambio sentía durante la investigación sumarial de los hechos que "...estaba hasta el presente muy ajeno el deber que tenía de justificar mi actuación en los referidos sucesos, pues no se me había dado conocimiento de ello".<sup>9602</sup> Por otra parte, Marambio no se consideraba "...comprendido en las disposiciones tomadas por el **Tribunal de Clasificación de Servicios Militares**, con respecto a los Jefes, 2os Jefes de los Cuerpos sublevados, y demás jefes con mando directo de tropas, por cuanto, en mi carácter de Jefe de Estado Mayor no tenía mando directo de tropa con arreglo a los reglamentos vigentes de aquella época".<sup>9603</sup>

En efecto, a los jefes de Estado Mayor no les correspondía entonces "...la sucesión de mando en igualdad de grado, como está dispuesto en la actualidad, y las tropas de la guarnición de Mendoza no estaban por lo tanto a mis ordenes sino bajo el mando directo del jefe de mayor graduación o antigüedad, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y el criterio del Comando de la Región expresado claramente en el documento cuya copia adjunto".<sup>9604</sup>

Por otra parte, el servicio de Jefe de Día, que era el cargo que había ostentado en esa ocasión el Mayor Octavio Fernández (18-1-A), "...estaba establecido regular y los jefes de cuerpo tenían, desde tiempo atrás, la orden de ejercer una especie de vigilancia (telegrama cuya copia acompaño)".<sup>9605</sup> Los hechos relacionados demuestran pues que, aún cuando Marambio "...no tenía mando directo de tropas, cuando estalló el movimiento subversivo el 4 de febrero de 1905, hizo en dichas circunstancias cuanto le fue posible, acudiendo sin demora a donde, en su concepto, lo llamaba el cumplimiento del deber".<sup>9606</sup>

#### **G-VIII.- Resistencia de Sublevados a la Represalia Contra-Revolucionaria (Mendoza, 1905).**

Los sucesos insurreccionales en Mendoza, como los ocurridos en Córdoba y Buenos Aires, duraron escasos tres días y se desarrollaron desde la madrugada del 4 de febrero de 1905 hasta la mañana del día 6, participando en los mismos militares y civiles. Los civiles y militares sublevados en la ciudad de Mendoza conjuntamente con soldados de infantería y piezas de combate atacaron y tomaron la Casa de Gobierno, el Depósito de Armas, la Policía, el Cuartel 2 de Cazadores.<sup>9607</sup> El Gral. Ignacio Fotheringham, que ejercía el comando de la Región militar, pero que estuvo ausente de los episodios por haber estado residiendo en la provincia de Córdoba, narró lo sucedido en el movimiento insurgente dividiendo su exposición en quince capítulos, plenos de detalles significativos para la caracterización del conflicto.<sup>9608</sup> Las fuerzas sublevadas que actuaron en Mendoza habían sacado del Cuartel "...nueve (9) piezas de Montaña, y del Depósito de Armas otras dos piezas".<sup>9609</sup>

Los ataques revolucionarios en la ciudad de Mendoza se redujeron al Depósito de Armas, la Casa de Gobierno, la Policía, y el Cuartel 2 de Cazadores. En cuanto al ataque concretado contra el Depósito de Armas, el Subteniente Solaune, el Alférez Emilio Quellet [25-6-A] y quince o veinte entre soldados del 2 de Cazadores y particulares, intimaron rendición al Subteniente Agustín Celedonio Estivill [33-80-I]. Para lograr ello “...forzaron el portón: La guardia fue sorprendida: Entraron a tiros, hirieron dos o tres, asesinaron (no hay otra palabra) en la cama o levantándose al Comandante Don Aquiles Zuloaga [7-13-I]”.<sup>9610</sup> Según Fotheringham “...había enemistad de parte del Teniente Solaune por arresto impuesto y encarnizamiento de asesino de parte del Alférez Quellet. Fue rápido el ataque y pronta la entrega. El Subteniente Estival pudo escaparse en la confusión. Este ataque fue el primer avance y a las 3 y 30 ya estaba el Arsenal en poder de los sublevados”.<sup>9611</sup>

Respecto al ataque al Cuartel 2 de Cazadores, los rebeldes llevaron todas las fuerzas a actuar como a la 1 p.m. de ese mismo día 4 de febrero. Los sublevados habían salido sigilosamente de este, su cuartel, a las 2 y 30 a.m. Fotheringham lamentaba relatar que el Comandante del Cuartel 2 de Cazadores Tte. 1º Don Basilio Pertine [21-16-I] dormía “...en su pieza y el Subteniente de Guardia Don Roque Núñez dormitando en una silla por efecto, según él, de narcótico, suministrado, nada sintiera de la salida de la tropa con guardia Oficiales y todo”.<sup>9612</sup> Al Teniente Pertiné le pusieron un centinela de vista para cuando se despertara. Nada supieron de semejante movimiento”.<sup>9613</sup>

Parece que el mencionado Subteniente Roque Núñez “...estaba en la Mayoría: siendo de su deber de estar en la Guardia. Pero sea de ello lo que fuere no estaba ni en su puesto, ni vigilando”.<sup>9614</sup> A los primeros tiros, a las 2 y 55 a.m., que partieron del Gran Hotel, “...tiros al aire de revolver, como señal convenida, y disparados por el Dr. José Néstor Lencinas y ocho o diez mas, salieron del Jockey Club, al lado del Hotel, el Gefe del 2º de Cazadores Teniente Coronel Don Raúl Rawson, el Gefe de Policía Don Dionisio Ariosa y varios otros”.<sup>9615</sup>

Con relación al ataque llevado a cabo por los sublevados contra la Casa de Gobierno y la Policía, se puede decir que “...apenas emplazaron unas piezas a las 3 y 30 a.m. y tiraron unos pocos tiros. Parece que viéndose la Policía sin los Comisarios u Oficiales, muchos se fueron disparando [escapando] del peligro”.<sup>9616</sup> El ataque recio de los rebeldes recién se llevó a cabo “...a las 10 y 30 a.m. con cinco piezas por lo menos toda la Infantería y cantones en varios puntos”.<sup>9617</sup>

Una vez en la Casa de Gobierno, el oficialista Mayor Octavio Fernández sintió como el fuego de cañón y fusilería arreciaba al máximo por todas partes. Con la aprobación del Gobernador, dicho Mayor Fernández “...se tuvo que rendir a las 12 y 30 del día. Inútil creo agregar donde tuvieron las piezas [de artillería] los sublevados, pero las tenía en tres puntos distintos, todas convergiendo sobre la Policía y Casa de Gobierno. Al mismo tiempo [los rebeldes] atacaban con partes de sus fuerzas a la Penitenciaría o Cárcel que estaba defendida por el [oficialista] Mayor Don José Rodríguez del 2 de Cazadores y 25 hombres mas o menos”.<sup>9618</sup> Lacoste (1990) relata que la rendición fue dos horas más tarde, a las 14 horas de dicho día 4 de febrero.<sup>9619</sup>

En cuanto a la marcha de los oficiales y tropa sublevada, para atacar a la oficialista Brigada San Juan, al mando del Coronel Antonio Tiscornia, se la consideraba de vital

importancia para acelerar la ofensiva revolucionaria, que al no dar tregua al enemigo, pudiera continuar derrotándolo y así desintegrar su poder de fuego. Al respecto, el Gral. Fotheringham declaró que "...se han hecho las más prolijas investigaciones para saber con exactitud el número de fuerzas de los sublevados que marchó a resistir o atacar al Coronel Tiscornia".<sup>9620</sup> El Gral. Fotheringham tuvo Informes "...de los Mayores Fernández y Rodríguez y otros tomados a los clases y soldados rebeldes, prisioneros".<sup>9621</sup>

Parece que a la noche, tarde del día cuatro "...marchó una columna [revolucionaria] de Infantería y de cómo 60 soldados y 40 o mas **particulares** [civiles]: 40 del 1º de Caballería y **algunos particulares** y seis piezas con cabos y sargentos de Gefes de sección o aún de pieza".<sup>9622</sup> Llegaron muy avanzada la noche a la Plaza de Las Heras y "...mandaron como avanzada dos piezas y algunos soldados, tal vez sesenta, a ocupar la Estación Panquegua que está situada como a quince cuadras más allá, hacia San Juan".<sup>9623</sup>

Todos están contestes que entre la tropa sublevada "...no había buena dirección. Y debe ser así: pues el Gefe más caracterizado era un Capitán [Eusebio] Ibáñez y en las varias narraciones hechas, no le he oído citar".<sup>9624</sup> En cuanto al entrerriano Capitán Luis F. Pérez Colman [21-7-C], éste no entró, según entiende Fotheringham, "...en ninguno de los combates, y para mi es hasta hoy incomprensible su proceder, que lamento sobremanera, pues siempre lo juzgué como Oficial muy distinguido y de mucha promesa".<sup>9625</sup> Toda la actuación revolucionaria parece "...haber sido bastante desordenada, sin plan fijo o unidad de acción. Las avanzadas [revolucionarias] se batieron, tan pronto como se pusieron en contacto con las fuerzas [represivas] venidas de San Juan en la mañana temprano, del día 5 y luego se retiraron de la Estación citada a la Plaza Las Heras".<sup>9626</sup>

En esta Plaza Las Heras, los rebeldes ocuparon un cuartel de Policía, y "...emplazaron allí cinco piezas, y distribuyeron sus fuerzas de Infantería para la resistencia. Una pieza mas situaron en una viña al Oeste (me dicen). Supongo que será de D. Pedro Prandi- y según aseguran vecinos de Las Heras principiaron a hacer fuego nutrido de fusilería, sin tener enemigos a la vista".<sup>9627</sup> Esta irracional actitud, el Gral. Fotheringham no la comprendía muy bien, "...pues sublevados y todo, es fuera de duda que valor no les faltaba, pues lo demostraron bien firme desde un principio. Tal vez hayan querido hacer entender a los que quedaron, que el enemigo estaba cerca y que ellos estaban resueltos a sostenerse".<sup>9628</sup>

Del departamento Las Heras los rebeldes regresaron a la Ciudad "...algunas fuerzas, para ir otra vez en la noche del día 5, a ocupar su puesto en la mencionada Plaza. Todos están contestes en haberse retirado todos antes de las 2 a.m. del día 6 para emprender la retirada y luego la desbandada general. La revolución o sublevación había terminado por completo el día 6 a las dos de la mañana".<sup>9629</sup>

En cuanto a los heridos y muertos, felizmente para Fotheringham no ha habido muchos en estos luctuosos sucesos.<sup>9630</sup> En cuanto a los fugados y presos entre los sublevados,<sup>9631</sup> también se había fugado el Farmacéutico del 1 de Caballería José C. López que vino con los sublevados y está "...complicado y preso el Preboste del 4 de Infantería Miguel Aparicio".<sup>9632</sup> Casi en su totalidad están presentes los soldados y clases que acompañaron tan reciamente a los Oficiales Subalternos sublevados a tal punto que en

todas las listas, no faltan mas de dos”.<sup>9633</sup> Finalmente, las secciones Sanidad y Capellanía fueron dos reparticiones militares que contaron con las felicitaciones de Fotheringham.<sup>9634</sup>

#### **G-IX.- El Efecto Dominó en las Insurrecciones Cívico-Militares.**

El resultado de las insurrecciones cívico-militares estaba marcado por la correlación interna de las fuerzas desplegadas. Por lo general, los resultados de una contienda ocurrida en la ciudad de Buenos Aires, o en la capital de una provincia, tenía un efecto dominó o de contagio automático sobre el resto de las unidades insurrectas. A diferencia de la Revolución de 1893, cuya conducción estuvo desarticulada regionalmente, al extremo que los alzamientos se sucedieron cronológicamente en tiempos sucesivos (Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, y por último Corrientes), la Revolución de 1905 contaba con una unidad de mando centralizada que hizo que cuando se decidió pronunciar la rebelión la madrugada del 4 de febrero de 1905 como cuando se acordó capitular tres días después, el 6 de febrero, todas las juntas revolucionarias de cabecera en cada provincia acataron la decisión.

Los oficiales y civiles insurrectos que en 1905 sublevaron en Santa Fe el Batallón 9 de Infantería (Puerto San Martín, Santa Fe) y el Regimiento 3 de Artillería, acantonado en San Lorenzo (Santa Fe), el Capitán Pedro N. Zeballos, y los mayores Doralio Hermosid (12-39-I) y Adolfo Benavídez (14-12-I), así como los oficiales y civiles que sublevaron los Regimientos 2 y 6 de Infantería, acantonados en Bahía Blanca, como los que se rebelaron en Mendoza y en Córdoba, fueron sorprendidos por el fracaso de la revolución en Buenos Aires. Aparentemente, en Buenos Aires no se alcanzó a copar el Arsenal de Guerra, defendido por el General Carlos Smith. Las noticias que se transmitieron el día 5 eran de que, para ese entonces, las fuerzas sublevadas en Buenos Aires por los Tenientes Coroneles Fabián Doll (16-49-A) y Daniel Aranzadi (16-29-I), el mayor Marcos Hermelo (18-22-C), y el Capitán Francisco Reynolds (23-3-A), que debían servir de apoyo al copamiento del Arsenal de Guerra, retornaban sin pelear a los cuarteles del acantonamiento de Campo de Mayo.<sup>9635</sup>

La infausta novedad provocó en Rosario entre las filas de los insurgentes la necesidad de convocar a un Consejo de Oficiales. Contra la voluntad de los civiles rosarinos Ricardo Núñez, José Chiozza y José Bacigalupo, el Capitán Zeballos y los mayores Hermosid y Benavídez votaron por no tomar la ciudad de Rosario ni prolongar la acción revolucionaria, y “...hacer volver la tropa a los cuarteles, ya que ellos no se habían comprometido para una guerra”.<sup>9636</sup> En efecto, los oficiales se habían conjurado para una insurrección y no para una guerra sostenida en el tiempo contra un gobierno central con un ejército mucho mejor pertrechado. No obstante la prudencia del Cap. Zeballos, que probablemente salvó a la ciudad de Rosario de hechos peores a los acontecidos en Pirovano (Pcia. de Buenos Aires), ello no fue óbice para que los Mayores Noverasco y D’Amico le remacharan una barra de grillos, tanto a Zeballos como también al Teniente Vivanco, y a los civiles José Chiozza, Conrado Pujol, Rómulo Caminos y Ricardo Caballero.<sup>9637</sup>

#### **G-X.- Conclusiones**

Las insurrecciones cívico-militares ocultaban en su seno un intenso desequilibrio de la relación de fuerzas existente entre numerosos actores, esferas y niveles del escenario político. Dicho desequilibrio se inició con la estrategia revolucionaria ensayada desde arriba por el Ministro Aristóbulo del Valle, y se vio acentuada más tarde, a partir de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, por la vulnerabilidad que padecían las unidades militares al estar compuestas por tropas bisoñas, reclutadas compulsivamente, y no ser más tropa de naturaleza veterana y voluntaria. Los acuerdos secretos de no agresión o no beligerancia pactados durante las insurrecciones, a espaldas de los reglamentos militares, muy difíciles de desentrañar por los jueces de instrucción castrense, obedecieron también a la diferente correlación interna de fuerzas existentes en cada guarnición y en cada unidad.

A renglón seguido habremos de indagar en la necesidad que tenía el establishment político-militar de restaurar el orden burocrático-oligárquico erosionado y de implantar una rígida disciplina enmarcada en un nuevo orden político de naturaleza pretoriana.

### **Epilogo-Sección IV-B.-**

El orden político fundado en dispositivos tan vulnerables como los prebendarios y nepóticos tuvo necesariamente que degenerar en lo que se conoció luego como un orden burocrático-patrimonial oligárquico. Este orden oligárquico dio lugar a su vez a un clima conspirativo que fue fragmentando el espíritu de cuerpo o cohesión corporativa de uno de los pilares del esquizofrénico modelo político meritocrático-patrimonial-ilustrado, al extremo de desatar un proceso insurreccional de largo plazo e intensidad creciente, que de haber triunfado militarmente habría desatado un proceso de reformas económicas entre las cuales no se podía descartar –al menos en el pensamiento de Alem-- la redistribución de la tenencia de la tierra. En ese proceso insurreccional cívico-militar le cupo a la junta civil la dirección del frente militar, incorporando en su lucha a cuanta unidad militar se pronunciaba, incluidos los cadetes del Colegio Militar.

Para frenar la crisis revolucionaria orgánica, iniciada en Julio de 1890 y aún vigente en 1893, los intereses internos y externos amenazados comenzaron una contraofensiva destinada a debilitar y vaciar el frente revolucionario democrático-popular mediante tácticas y estrategias divisionistas. Una de esas tácticas fue seducir políticamente con una efímera componenda electoral a la fracción más reformista de la coalición revolucionaria, que en ese preciso caso fue el Mitrisismo con su política del Acuerdo, y como más tarde durante la presidencia de José Evaristo Uriburu lo fue el Bernardismo o Irigoyenismo (por Bernardo de Irigoyen) con su política de las “paralelas”.

Las insurrecciones cívico-militares ocultaban en su seno un intenso desequilibrio de la relación de fuerzas existente entre numerosos actores, esferas y niveles del escenario político. Dicho desequilibrio se inició con la estrategia revolucionaria ensayada desde arriba por el Ministro Aristóbulo del Valle, y se vio acentuada más tarde, a partir de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, por la vulnerabilidad que padecían las unidades militares al estar compuestas por tropas bisoñas, reclutadas compulsivamente, y no ser más tropa de naturaleza veterana y voluntaria. Los acuerdos secretos de no agresión o no beligerancia pactados durante las insurrecciones, a espaldas de los reglamentos militares, muy difíciles de desentrañar por los jueces de instrucción castrense,

obedecieron también a la diferente correlación interna de fuerzas existentes en cada guarnición y en cada unidad.

## **Sección IV-C.- Construcción de un orden oligárquico-militarista.**

Cubierto en la segunda sección los temas de la reacción o resistencia cívica revolucionaria y el del abstencionismo armado (1890-1905), corresponde ahora que encaremos sus lógicos derivados, el de la necesidad por parte del establishment político-militar de restaurar el orden burocrático-oligárquico erosionado y de implantar una rígida disciplina enmarcada en un nuevo orden político de naturaleza pretoriana.<sup>9638</sup>

En la América Latina finisecular, los regímenes oligárquicos propios de una modernidad tardía y traicionada se plantearon entonces como problema capital resolver las crisis insurreccionales crónicas, que sin caer en el militarismo o el cesarismo impusieran un orden pretoriano.<sup>9639</sup> Para esa difícil y problemática tarea, en México se dio el Porfirismo, en Venezuela el Castro-gomecismo, y en Argentina el Roquismo.<sup>9640</sup> Pero a diferencia de estos casos líderes, en Argentina el ejército de línea había experimentado una fractura violenta, por obra de insurrecciones cívico-militares, que habrían dado lugar como respuesta un pretorianismo de base oligárquica que fue la antesala mediata del militarismo golpista iniciado en 1930. Por ello es que, Deonildo Muñoz, director de *El Municipio* (Rosario), manifestaba que tanto el Presidente Carlos Pellegrini como el Ministro de Guerra Gral. Nicolás Levalle no comprendieron que la revolución del Parque (1890) “...dejaba al ejército sin unidad, sin aprecio para con el gobierno, sin aquella convicción íntima de servir a la patria y no a los tiranos, que constituye la mejor salvaguarda de la disciplina”.<sup>9641</sup> Por lo mismo, no se cuidaron de ello, y por el contrario creyeron que “...con el sistema de los acuartelamientos, con las ridiculeces de las grandes maniobras, con el espionaje, el favoritismo y los arrebatos autoritarios hubieran conseguido matar en el soldado y en la oficialidad el criterio, transformándolos en máquinas automáticas”.<sup>9642</sup>

En esta tercera sección, dedicada al estudio de la construcción de un orden burocrático pretoriano, proseguimos con cuatro capítulos que están consagrados al análisis del orden burocrático-pretoriano y la manipulación tecnológica, al corporatismo militar en la transición a un orden burocrático-pretoriano (disciplina, castigos, honor, liderazgo, camaradería), a su relación con el escarmiento anti-sedicioso, y a la formación de un orden consensual de frontera o “misión civilizatoria”.

## **Capítulo IV-C-8**

### **Orden Burocrático-Pretoriano y Manipulación Social y Tecnológica.**

## Índice del Capítulo IV-C-8

### H.- Orden Burocrático-Pretoriano y Manipulación Social y Tecnológica.

H-I.- Manipulación tecnológica y potenciación de la represión y la disuasión (1880-1896)

H-II.- Traslado, disolución y refundición de unidades militares (1890-1891).

H-III.- Reserva de violencia disuasoria en acción pretoriana o contra-revolucionaria (Tucumán, 1893/Brigada San Juan, 1905).

H-IV.- Contra-ataque conjunto de fuerzas leales (Mendoza, 1905).

H-V.- Previsión de amotinamientos y confusión de fuego amigo entre la tropa represora (Mendoza, 1905).

H-VI.- Conclusiones.

### Palabras Claves

Acción pretoriana o contra-revolucionaria—logística comunicacional--disolución de batallones revolucionarios--expansión comunicacional--fuego amigo--fuerza coactiva en el conflicto de clase--manipulación militar—orden burocrático-pretoriano--orden interno contra-insurgente--potenciación de la represión--progreso tecnológico--reserva de violencia disuasoria-

### Keywords

Bureaucratic-praetorian order--communication logistics--military manipulation--counter-insurgency--internal order—technological progress.

## H-. Orden Burocrático-Pretoriano y Manipulación Social y Tecnológica.

Hemos visto en los capítulos anteriores como la opinión de los altos jefes y oficiales, muy influidos por el prestigio internacional que adquirió la concepción política Bismarkiana de la revolución desde arriba; la estrategia militar de Moltke que se expresaba en el pretorianismo o germanismo militar; y la recidiva del colonialismo galo, ejemplificada en el comportamiento de la Legión Extranjera, se dirigía hacia el refuerzo de la noción de disciplina pasiva. En este capítulo veremos como dichos altos mandos se reorientaban en un curso coactivo o de orden represivo interno más propio de guardias pretorianas o estados gendarmes que de ejércitos de línea republicanos.<sup>9643</sup>

Este curso represivo o pretoriano estaba condicionado por el contexto de una expansión colonialista de las metrópolis europeas (Congreso de Berlín de 1884), y estaba dirigido a preservar la reproducción social, política, económica y cultural (comunicacional) de un orden burocrático y un estado oligárquico, tanto contra aquellos integrantes de sus propias filas militares que tomaban partido a favor de la oposición política republicana y democrática, desobedeciendo las órdenes de mando; como contra aquellos sectores civiles pertenecientes a los nuevos partidos opositores (Radicales, Socialistas) o a los gremios obreros en huelga.

Este octavo capítulo lo subdividiremos en cinco (5) apartados, que se inician con el estudio del progreso tecnológico y su efecto multiplicador en la represión interna y la disuasión externa (1880-1893); prosigue con la disolución y refundición de los batallones revolucionarios como dispositivo punitivo (1890-1891); se dramatiza con la reserva de violencia como disuasión contra-revolucionaria (Tucumán, 1893/Brigada San Juan, 1905); para luego encarar el análisis del contra-ataque combinado de las fuerzas leales (Mendoza, 1905); y cerrar finalmente con la previsión de amotinamientos y la confusión de fuego amigo entre la tropa represora (Mendoza, 1905).

### **H-I.- Manipulación tecnológica y potenciación de la represión interna y la disuasión externa (1880-1896)**

La tecnología es un elemento que pertenece a la esfera cultural, y como tal ha sido siempre un material estrechamente lindante con la esfera militar, y extremadamente propicio para dirimir la infraestructura física de las guerras y las luchas político-militares.<sup>9644</sup> Pero como sostenía Clausewitz, este material alteraba sólo la gramática del conflicto y no su lógica, la cual como no podía ser de otra forma, en esa etapa de la modernidad se fundaba en la lógica newtoniana, las teorías difusionistas y el determinismo lineal.<sup>9645</sup>

Un ligero bosquejo de los adelantos de la ciencia militar a fines del siglo XIX, le bastaban a Deolindo Muñoz, director de *El Municipio* (Rosario), para “...darnos una idea de las condiciones lastimosas en que nos hallamos nosotros, a pesar de que en los presupuestos nacionales háyanse destinado sumas relativamente cuantiosas para el armamento, la instrucción y organización de las tropas”.<sup>9646</sup>

Empezando por el armamento. El remington, excelente arma de precisión en otros tiempos, era en 1890 “...un fusil de museo, bueno para mantener el orden durante las inscripciones [electorales] y eficaz también, cuando los adversarios no cuentan con otros argumentos bélicos de mayor potencia y precisión”.<sup>9647</sup> Pero en ese entonces el remington merece, “...comparado con las armas adoptadas por las naciones cultas, el lugar de los fusiles de cápsula en relación con los de retrocarga”.<sup>9648</sup> El estado había firmado, a mediados de 1891, en Berlín, el contrato para la adquisición de 100 mil fusiles Mauser-Manlicher, último modelo, pero para Muñoz, no basta “...la compra del armamento; es preciso tener oficiales que conozcan los secretos de su uso, pues mucha diferencia hay entre mandar el fuego con una o con otra arma, y el oficial que no conoce de antemano los efectos probables del fusil, no está en condición de aprovecharlos”.<sup>9649</sup>

El modelo de Remington, en uso en nuestros batallones, no podría haber impedido, a juicio de Muñoz, que “...todos juntos, los diez mil hombres de que se compone el ejército de primera línea, quedaran sobre el terreno [es decir fuera de combate], cinco minutos después de haberse presentado ante dos mil hombres formados en guerrilla y armados con cualquiera de los fusiles a repetición, pólvora sin humo y calibre reducido de que están armados los ejércitos europeos y parte de los americanos”.<sup>9650</sup> No tendrían estos hombres siquiera, para Muñoz, ocasión “...de mostrar hasta donde llega el heroísmo del soldado argentino, y morirían viviendo a la patria sin ver quizás el enemigo que los aplasta con 60.000 tiros por minuto”.<sup>9651</sup> Lo dicho para la infantería podría aplicarse también, según Muñoz, “...a las otras armas por lo que se refiere a los rifles: quedando, pues, el solo cañón Krupp como tipo moderno y bueno del armamento de

nuestro ejército, aún cuando sobre ese tópico debería tenerse presente que importantes modificaciones han sido introducidas en las piezas de campaña por los estados civilizados, tanto en los accesorios como en los proyectiles y en la pólvora”.<sup>9652</sup>

Pero si bien la tecnología armamentista y comunicacional (líneas telegráficas, vías férreas y transporte fluvial) cumplió a fines del siglo XIX un rol determinante en la represión de las insurrecciones cívico-militares y los levantamientos indígenas así como en la disuasión geopolítica de guerras entre naciones vecinas, no alcanzó para impedir que las insurrecciones se materializaran y estallaran. Su notable expansión en breves años permitió que en cada oportunidad en que se produjeron malones, levantamientos armados cívico-militares y amenazas de guerras internacionales la velocidad con que estos últimos se precipitaban así como la creciente eficacia del armamento (cañones Krupp, ametralladoras Gatling y fusiles Remington y Enfield en la represión del alzamiento de López Jordán durante la Presidencia de Sarmiento), la rapidez del transporte (locomotoras) y la celeridad con que se convocaban telegráficamente, acentuaron a límites insospechados las fuerzas de la represión interna y la disuasión externa.<sup>9653</sup> De apenas un millar de kilómetros de vías férreas en 1880, se pasó a 6.700 en 1887, a 7.700 en 1888, a 8.000 en 1890, a 13.000 en 1894; a 15.000 km en 1896, y al doble o 27.000 km en 1910, a un costo neto por kilómetro de \$12.000 pesos fuertes (cifra que incluye el costo de la mano de obra forzosamente des-etnizada).<sup>9654</sup>

El tendido de las líneas ferroviarias y telegráficas fue sin duda uno de los principales elementos que coadyuvó a la extensión del “espacio vital” argentino.<sup>9655</sup> Esa extensión dio lugar a su vez a polemizar sobre la estrategia militar más idónea a desplegar en las fronteras.<sup>9656</sup> Con el establecimiento de líneas telegráficas en la frontera del Chaco el Comandante Teniente Coronel Napoleón Uriburu manifestó en 1872 que “...se reportarían inmensas ventajas; entre ellas, economizar animales y hombres en la transmisión del parte diario en esta extensa frontera”.<sup>9657</sup> En ese solo servicio “...se ocupan treinta y dos individuos, y aunque lo ejecutan con regularidad, aun recorriendo cuarenta leguas algunos de ellos, es muy posible que al desempeñarlo tropezaran con una partida de indios mucho mayor que no les permitiera continuar su comisión”.<sup>9658</sup>

Y diez años después, cuando la Revolución del 80, el corte de los hilos eléctricos y la manipulación de los cambios y señales ferroviarias fueron una táctica usual practicada por los revolucionarios.<sup>9659</sup> Y trece años más tarde, en septiembre de 1893, la marcha desde la Capital a la provincia de Tucumán con motivo del amotinamiento y posterior sublevación en aquella ciudad del Regimiento 11 de Infantería de Línea representó -- para el Coronel Rodríguez (1964)-- el primer caso de transporte de tropas a larga distancia y en pie de guerra en la historia del país.<sup>9660</sup> Dicho amotinamiento y sublevación había alterado el orden público de aquella provincia y originado la caída del Gobierno de aquel estado federal. Para contrarrestarla y paliar el sabotaje practicado en las líneas de rieles, el Mayor Américo Sassi recibió en la provincia de Santa Fé la orden del Jefe Superior de las Fuerzas General Francisco B. Bosch, de que “...con su compañía de Granaderos se adelantara (en Rafaela) y arreglara la vía férrea y alcantarillas que en largos y varios puntos habían destruido las fuerzas de la revolución, con el propósito de retardar nuestra marcha y nos diera vía segura y libre, desempeñando esta difícil comisión el Capitán Sassi a entera satisfacción del Señor General en Jefe y camaradas de la División”.<sup>9661</sup> Finalmente, Amaya (2005) nos refiere como los indígenas del Chaco se las arreglaban para sabotear los postes y los hilos de las líneas telegráficas.

La Dirección General de Ferrocarriles Nacionales entendía en 1898 que había secundado la acción del Estado Mayor del ejército en lo que atañe a los transportes militares en las movilizaciones de conscriptos, "...realizando con rapidez y exactitud la concentración y la dislocación de las tropas".<sup>9662</sup> El Poder Ejecutivo tenía, derivado de la ley de ferrocarriles, el derecho para "...transportar por los ferrocarriles tropas y materiales de guerra con sólo dar aviso al Jefe de estación con dos horas de anticipación".<sup>9663</sup>

En oportunidad de producirse el frustrado conato conspirativo ocurrido en San Luis en 1904, en el sumario que al respecto se instruyó, el testigo Miguel Vigo fue preguntado: "...si es cierto....que las personas comprometidas con la revolución y que están en Mackenna [Córdoba], producido el movimiento debían cortar la vía férrea y poner los medios a su alcance para evitar que vayan al litoral los contingentes que las provincias andinas quisiesen mandar al gobierno nacional y que el núcleo revolucionario existente en Mackenna está en íntima relación con los que en esta ciudad preparan o deben encabezar el movimiento".<sup>9664</sup> Con respecto a las comunicaciones telegráficas, durante la Revolución de Febrero de 1905 en Córdoba, el Subteniente Regino P. Lezcano practicó una jira por las vías del Ferrocarril Central Argentino, donde aparte de reunir una docena de locomotoras, con las que atoró las vías perjudicando el desplazamiento de los convoyes leales, recogió "...varios aparatos telegráficos y las clavijas del conmutador de comunicaciones, dejando totalmente interrumpida la línea telegráfica".<sup>9665</sup>

## H-II.- Traslado, disolución y refundición de unidades militares (1890-1891).

Las unidades militares, en el período previo a la Ley Riccheri (1902), contaban con una experiencia de vida muy intensa que jalonaba su historial con premios y trofeos. Por ello, cualquier medida que afectara su identidad histórica era recepcionada como una suerte de bochorno. Con la Orden General del 14 de agosto de 1890 el Ministro Nicolás Levalle (o Levaggi) castigó a los regimientos que participaron de la Revolución del Parque con la vergüenza de su disolución y consiguiente refundición en otros batallones.<sup>9666</sup> Como con esta medida punitiva Levalle olvidaba las glorias que en su larga historia de lucha habían conquistado los regimientos incriminados, los periodistas del periódico *El Diario*, que firmaban bajo los seudónimos de *Yaro* y de *Justus*, estimaban que dicha medida había diseminado elementos de perturbación y de odios que "...a la corta o a la larga producirán en el ejército los resultados más funestos".<sup>9667</sup>

Los oficiales y soldados refundidos en otros batallones se hallaban carcomidos por la ansiedad de su propia identidad militar, es decir del número y la denominación del regimiento, que en ese entonces lucían en su uniforme, pero que ya habían dejado de existir, y "...de la bandera de que le despojaron y a cuya sombra se batió con honor tantas veces; que entre sus camaradas existía ese espíritu de cuerpo que obliga al soldado a experimentar las más caras afecciones para con el batallón a cuyas filas pertenece, cuya historia conoce, y de cuyos antecedentes se muestra orgulloso".<sup>9668</sup>

Esos oficiales y soldados "...que hubieran entrado nuevamente a la obediencia disciplinaria después de ser dominados con lealtad, no podrán nunca conformarse con que se les afrente suprimiéndoles el número de cuerpo, que es su propiedad pagada en

sangre, arrebatándoles la bandera, que es su religión, y distribuyéndolos por lotes como chuzma pampeana”.<sup>9669</sup> En el 1er Regimiento de Artillería, como en los otros cuerpos, “...había hombres encanecidos bajo su bandera, verdaderos hijos del Regimiento, que hubieran preferido morir antes que aprobar la disolución de su única familia; Estos gérmenes de positiva y explicable anarquía pudieron ser muertos para siempre con el solo cumplimiento leal de lo pactado”.<sup>9670</sup>

Lamentablemente, esta práctica represiva se mantuvo en el tiempo, alcanzando incluso a las postrimerías de la Revolución de 1905. En esa oportunidad fueron disueltos los regimientos 2 y 6 de la Infantería de Línea y los batallones de zapadores, ferroviarios y telegrafistas.<sup>9671</sup>

Pero no sólo eran trasladados los oficiales de los regimientos sospechosos de conspirar contra las autoridades, sino también las mismas unidades de línea, ya sea para reprimir a los amotinados o como represalia por la sublevación, con todos los costos que ello significaba. En ambos sentidos, se trasladaron tanto los regimientos de infantería, como los de artillería y los de caballería, siendo los primeros los que más sufrieron esa experiencia entre punitiva y represora. Con motivo de la revolución de 1890, que el coronel Nellar denomina “golpe de estado”, fueron trasladados los regimientos 1 de artillería, y los regimientos 2, 9 y 10 de infantería.<sup>9672</sup> A raíz de la revolución de 1893 fueron trasladados los regimientos 1 y 11 de infantería.<sup>9673</sup> Y con relación a la sublevación cívico-militar de 1905, fueron trasladados los regimientos 3 de artillería y el 8 de infantería.<sup>9674</sup> Nellar (1972) cuenta como los regimientos 2 y 8 de infantería y el 6 de caballería fueron embarcados en Puerto Barranqueras (Chaco) con destino a la Capital en razón de “...advertirse las primeras manifestaciones del movimiento armado que preparaba la Unión Cívica”, participando activamente en el sofocamiento de la Revolución de 1890.<sup>9675</sup> Para disuadir el clima revolucionario imperante en la provincia de Santa Fe fue infructuosamente trasladado a Rosario el regimiento 3 de infantería.<sup>9676</sup> Por el probable estallido de una revolución en febrero de 1892 fue trasladado a Mendoza el regimiento 4 de infantería.<sup>9677</sup> Y en agosto de 1893, con motivo de la revolución radical, fueron trasladados a Santa Fe los regimientos 9 y 12 de caballería.<sup>9678</sup>

### **H-III.- Reserva de violencia disuasoria en acción contra-revolucionaria (Tucumán, 1893/Brigada San Juan, 1905).**

Los Ministros de Guerra se ocupaban de diagramar en cada guarnición un delicado equilibrio de poder, de modo tal que pudieran siempre contar en cada una de dichas guarniciones con elementos de absoluta lealtad que contrabalancearan situaciones de peligro.

En las orillas de la Ciudad de Tucumán el Coronel Salvador Tula recibió el 25 de septiembre de 1893 la orden del General Francisco B. Bosch, Comandante en Jefe de las fuerzas represivas, de restablecer el orden tomando “...a viva fuerza la Penitenciaría de aquella ciudad, donde se encontraban atrincheradas las fuerzas revolucionarias que resistían a las fuerzas nacionales”.<sup>9679</sup> En ese punto se combatió “...por espacio de tres cuartos de hora, con la infantería y dos piezas de artillería que protegían con sus fuegos nuestro asalto, hasta llegar primero el Capitán [Américo] Sassi con su compañía de Granaderos a la puerta del Cuartel con el General en Jefe de las fuerzas General Don

Francisco B. Bosch y el Dr. D. Carlos Pellegrini, intimando rendición a las fuerzas sublevadas para evitar así más efusión de sangre: mereciendo por esta distinguida acción el Capitán Sassi, las más efusivas felicitaciones de los S.S. arriba nombradas y demás camaradas de la división”.<sup>9680</sup>

Y casi doce años después, en la región de Cuyo, a juzgar por el Informe elevado por el Coronel Antonio Tiscornia, el 4 de febrero de 1905 (a las 9 y media a.m.) este último recibió “...orden de S.E. el Sr. Ministro de Guerra de atacar a Mendoza por haberse sublevado la guarnición de esa ciudad”.<sup>9681</sup> Al mediodía, Tiscornia se embarcó en San Juan “...con aproximadamente cien soldados de infantería y dos piezas de artillería llegando a dos kilómetros de la estación Panquegua llegando mas o menos a las 6 y media del mismo día”.<sup>9682</sup>

Pero antes de salir de San Juan, Tiscornia se había cerciorado de las líneas de comunicación existentes. Para ello se había comunicado con el ex Administrador del Ferrocarril José A. Villalonga, único particular que poseía un servicio telegráfico propio, que a la sazón se encontraba en la estación de Mendoza, y que le manifestó a Tiscornia “...que la ciudad estaba en poder de los revoltosos y que a las 11 de ese día habían rendido el último cantón mandado por el Tte. [Basilio] Pretiñe”.<sup>9683</sup> Tiscornia le preguntó a Villalonga por el General Fotheringham y este le contestó “...que no sabía nada, en la estación Jocolí [Lavalle] recibí un telegrama del Comandante [Manuel] Rawson en que me decía que se encontraba en Santa Rosa con fuerzas que había organizado allí, como me dijera el Jefe de la Estación que diera noticias más a fin de evitar que desbarataran mi plan que era llegar lo más próximo a Mendoza sin que me costara la vida”.<sup>9684</sup>

Al llegar a inmediaciones de la estación Panquegua (quince cuadras al norte de la ciudad de Mendoza), Tiscornia inició escaramuzas y acciones de represalia. Para ello desembarcó “...la tropa y establecí el servicio de seguridad, a las 11 aproximadamente de esa noche se me incorporó el Comandante Constantino Reybaud [12-45-A] con seis piezas de artillería y próximamente con cien reservistas y voluntarios que le entregó el Gobernador de San Juan”.<sup>9685</sup> El día 5 de febrero a la madrugada Tiscornia hizo practicar “...un reconocimiento sobre Panquegua (Estación), me avisaron que estaba ocupada por fuerzas revolucionarias, ordené que la tomaran y después de un pequeño tiroteo fue cumplida la orden y me puse nuevamente en comunicación con el Gobierno de San Juan”.<sup>9686</sup>

Aproximadamente a las 4 a.m. de ese mismo día, según Tiscornia “...los revoltosos estaban posesionados de la Plaza Las Heras y las Avenidas que dan entrada a la ciudad rompieron el fuego sobre mi fuerza con cañón y fusil, como tenía la tropa dispuesta para esperar ese ataque a mi vez hice contestarlo con ocho piezas de artillería y mas o menos doscientos fusiles”.<sup>9687</sup> Este tiroteo duró aproximadamente hora y media “...hasta que fue suspendido por los revolucionarios, como a la hora próximamente de suspender el combate recibí un refuerzo de 80 hombres próximamente del gobierno de San Juan”.<sup>9688</sup>

Como a las 11 de la noche de ese día, Tiscornia recibió del Gral. Fotheringham, pero por intermedio del Comandante de Guardias Nacionales [Domingo] Astorga, “...una carta en que me felicitaba por el combate que había tenido y que necesitaba saber mis intenciones para tomar disposiciones”.<sup>9689</sup> Tiscornia le contestó que “...tenía fuerza suficiente para atacar al día siguiente y que como el decía que venía con la Artillería

sería bueno que hiciera sentir su cañón por la parte Sud que en esta forma los revolucionarios se dividirían y nos sería más fácil la entrada a Mendoza pues yo le calculaba a los revolucionarios dos mil hombres”.<sup>9690</sup>

Al día siguiente, a la madrugada, cuando Tiscornia se disponía a iniciar su avance, alegó que “...se me presentó el Capellán [Guillermo] Cubler [o Kubler] que estaba dentro de la ciudad de Mendoza manifestándome que los oficiales revolucionarios habían abandonado la tropa y se habían fugado a Chile y que los Jefes y Oficiales que habían puesto preso los revolucionarios estaban en libertad y que se ocupaban de juntar la gente a fin de evitar desorden”.<sup>9691</sup> Como Kubler le merecía entera confianza, Tiscornia ordenó “...que la tropa comiera pues hacia dos días que no lo hacía, alimentándose únicamente con uvas y pan, a las 12 de ese día entré a Mendoza y me comuniqué con el Sr. Gral. Fotheringham”.<sup>9692</sup>

El premio por el triunfo no se hizo esperar. Tiscornia reconoció que la tropa del 2 de Montaña y del 4 de Infantería “...que se distinguió por esos combates fue inmediatamente ascendida por el Boletín Militar”.<sup>9693</sup> En dichos combates Tiscornia tuvo “...un muerto y cinco heridos fuera de varios contusos”.<sup>9694</sup> Estas aclaraciones, según Tiscornia, las pueden informar “...los SS Comandantes D. Raimundo Baigorria, D. Pastor Guaycochea, Mayor [Eusebio] Ezpeleta [10-7-I], Mayor Andres Bruzzone, Capitan Ramón Mastai [22-24-I], Teniente Horacio Alberto Chiappe [32-25-I], Teniente [Julio A.] Costa y [Santiago] Buratovich [28-14-A], el Doctor Luis Cavilliotti, y otros oficiales del 2 de Montaña y 4 de Infantería, que en las respectivas mayorías debe haber antecedentes, lo mismo los oficiales revolucionarios que mandaron la fuerza sublevada, el Sr. Cnel. retirado [Ricardo] Mulleady también me acompañó y como Ayudante mío el Capitán [Justo] Cabeza [21-96-C], el Mayor Paye de Marina, el Doctor Gasyategui que estaba en esa fecha en comisión del servicio en San Juan”.<sup>9695</sup>

El 4 de febrero de 1905, el Ministro de Guerra Tte. Gral. Enrique Godoy envió un telegrama urgente, en que “...reordena ponerse inmediatamente en marcha sobre Mendoza con todas las tropas de que disponga y las fuerzas que le proporcione el Gobierno de esa provincia, debiendo proceder con toda actividad a fin de auxiliar al Gobierno de Mendoza, en cuya capital se está peleando. Que proceda con toda energía a fin de sofocar el movimiento revolucionario. El estado de sitio ha sido declarado en todo el territorio de la República y por lo tanto procederá como en estado de guerra”.<sup>9696</sup>

En efecto, el parte reservado del Gral. Fotheringham da cuenta al Ministro de Guerra de los hechos ocurridos en Mendoza el 4 de febrero de 1905. Dice el Gral. Fotheringham que “...estaba en Piedra Blanca, situada a 12 leguas de Río Cuarto [Córdoba], por malísimos caminos, cruzados por dos ríos, cuando recibió de Buenos Aires el telegrama del Sr. Ministro de Guerra fechado a las 8.25 a.m. del 4 de febrero de 1905, anunciándole un movimiento revolucionario en toda la República”.<sup>9697</sup> Según Fotheringham, el chasque llegó a la 1.30 P.M. y recién pudo “...ponerse en marcha una hora después, llegando a Río Cuarto cerca de las 8 P.M.”<sup>9698</sup> En el acto, Fotheringham ordenó “...le tuviesen tren listo para irse a Mendoza”.<sup>9699</sup> Como debía esperar órdenes en Río Cuarto, que le llegaron a las 10 P.M., Fotheringham recién a esa hora “...se puso en marcha, acompañado del Tte. Cnel. Don Américo Álvarez, que insistió en venir a pesar de estar enfermo, del Capitán Don Roberto Fotheringham (20-44-I) y del ciudadano Don Pablo Oliva Vélez”.<sup>9700</sup> Por telégrafo, Fotheringham dio cuenta exacta

“...de su marcha y llegado a Mendoza el día 6 en la mañana, cuando todo había concluido”.<sup>9701</sup>

No fue pues Fotheringham “...actor ni testigo de los sangrientos episodios ocurridos en la guarnición Mendoza el 4 de febrero de 1905, al sublevarse fuerzas del batallón 2 de Cazadores, 1º de Montaña, 1º de Caballería, 4º de Infantería y 2º de Artillería de Montaña”.<sup>9702</sup> Indudablemente, Tiscornia reconoce que la ausencia del Gral. Fotheringham favoreció a los revolucionarios, lo que “...les permitió adueñarse de Mendoza hasta que el Cnel. Tiscornia los desalojó de la ciudad con las fuerzas de la Brigada San Juan y otras que le proporcionó el gobierno de esta provincia, tras infligirles duro castigo al resistir el avance de esas fuerzas en Panquegua y Plaza Las Heras, el 5 de febrero de 1905. En estas acciones se distinguieron los Ttes. Cneles Constantino Raybaud [12-45-A] y Don Raymundo Baigorria [13-10-I], Jefes del 2º de Artillería de Montaña y 4º de Infantería, respectivamente. El Cnel. Tiscornia fue recomendado por su actuación en la Orden de la División Cuyo, de fecha 8 de febrero de 1905”.<sup>9703</sup>

Sin embargo, pese a no haber sido actor, el General Fotheringham ensaya una crítica muy positiva acerca del desempeño del Coronel Tiscornia. No era aceptable según él, que sin saber “...donde estaba el enemigo,...avanzase en tren, con artillería a bordo, más allá de lo que avanzó y Jocolí está a seis o siete leguas, entiendo de Panquegua- Se necesitaba pues varias horas de marcha. En la madrugada o temprano del día 5 avanzó resueltamente y ocupó Panquehua rechazando y haciendo retroceder el enemigo”.<sup>9704</sup>

Se lamenta finalmente Fotheringham que Tiscornia “...no haya tenido caballería, que al haberla tenido, hubiera sin duda conservado tenaz contacto y tal vez hubiera seguido esa misma noche su marcha a la ciudad. Le acompañaban Gefes bien meritorios como el Coronel [Ricardo] Mulleady y los Gefes del 2 de Montaña y 4 de Infantería Tenientes Coroneles Don Constantino Raybaud y Don Raimundo Baigorria, que siempre han demostrado su más decidido empeño para el mejor servicio”.<sup>9705</sup>

#### **H-IV.- Contraataque conjunto de Fuerzas leales (Mendoza, 1905).**

En el contra-ataque de las fuerzas leales iniciado en la propia ciudad de Mendoza, en febrero de 1905, diversos oficiales coincidieron en la tarea de la defensa. Tanto el Jefe de día Mayor Octavio Fernández (18-1-A) como el Jefe de la Cárcel o Penitenciaría Mayor José Rodríguez se habían ido al Challao (lugar próximo a la ciudad de Mendoza ubicado al pie de la montaña) donde tenían sus familias. Estando ahí, escuchando tiros y recibiendo noticias, el Mayor Fernández “...se lanzó a las 4 o 4 y 30 hacia la ciudad”.<sup>9706</sup> Dicho Mayor Fernández había encontrado por el camino de retorno al centro de Mendoza “...uno o dos soldados que se le incorporaron. En el cuartel del 1º de Montaña se le unieron 3 mas y al llegar cerca de la Policía encontró otros 7 que se le unieron después de arengarlos”.<sup>9707</sup>

El Mayor Fernández se dirigió primero a la Cárcel o Penitenciaría “...que está en la misma plaza donde está situada la Casa de Gobierno. Dejó allí unos pocos y se fue con 10: Echó abajo la puerta de la Casa de Gobierno y allí encontró al Señor Gobernador [Carlos Galigniana Segura] y al Dr. [Manuel] Amaya y al Sr. Céspedes (creo). Pidió el mando de las fuerzas de Policía y se lo dieron. Organizó la defensa con solo 35 hombres

de Policía y los 10 que llevaban. Pero desesperado por no tener una pieza salió a tomar una: Le hicieron varias descargas y no pudo realizar sus deseos”.<sup>9708</sup> Entonces el Mayor Octavio Fernández llamó a una clase y habló a la tropa (los 10) y les demostró “...la necesidad de tener una pieza, que con un cañón respondía del éxito. Se animaron a ir al Cuartel de Artillería a traerlo pero a pesar de sus protestas de energía y resolución, se juramentó de volver, no volvieron más”.<sup>9709</sup> Hizo otra salida el Mayor Octavio Fernández “...para el mismo fin pero sin resultado. Se concretó la defensa de la azotea, parapetada tomando todas las medidas del caso”.<sup>9710</sup>

La Penitenciaría o Cárcel estaba bajo el mando del Mayor José Rodríguez, del 2 de Cazadores, pero en oportunidad del alzamiento dicho Mayor también estaba “...con licencia en el Challao con su familia”.<sup>9711</sup> Pero a diferencia del Mayor Fernández, el Mayor Rodríguez tuvo la noticia de la sublevación tres horas después, recién a las 7 a.m..<sup>9712</sup> Para hacerse cargo de la defensa, el Mayor Rodríguez “...buscó caballo y no halló: Al fin encontró una yegua en poder de una señora anciana y se vino lo más apresurado posible”.<sup>9713</sup> Asimismo, Rodríguez tuvo la suerte de hallar “...en el Cuartel del 1 de Montaña y en el camino nueve o diez soldados que lo siguieron. Marchó sobre la Estación del G.O.A.- Nada de nuevo allí marchó por la calle Las Heras “al paso”-No pudo seguir por los cantones: Entonces tomó al Sud y se fue a la Plaza Independencia, yendo a la Cárcel- En una de sus salidas se encontró el Mayor O. Fernández con él: y los dos enérgicos soldados combinaron la defensa: el uno en la Policía, el otro (Rodríguez) en la Cárcel. Se batieron hasta más no poder. Un brillante par de dignos Gefes. Pero la cárcel cayó pocos minutos después de la Policía”.<sup>9714</sup> Hay detalles curiosos respecto a la prisión o arresto de estos Gefes [por parte de los revolucionarios] y su negación a dar su palabra de no hacer arma, etc. Pero las omito”.<sup>9715</sup>

En cuanto al Comandante Raúl Rawson, jefe del 2º de Cazadores, anoticiado de la insurrección, y volviendo del Jockey Club, corrió a su cuartel donde no encontró sino al Subteniente Núñez, que se levantó azorado, al notar “...la desaparición de la guardia y de la tropa, y gritó: ‘Comandante, el Batallón se ha sublevado’ y al notar que estaba un centinela vigilando el cuarto del Teniente Pretiñe, tomó un rifle y dijo: ¿Quiere que lo mate? Y el a lo que el Comandante Rawson se opuso”.<sup>9716</sup> Rawson preguntó en su cuartel “...que tropa había, y no había mas que el Sargento Almirón. Llamó a este Sargento: el centinela aquel huyó y al rato se presentó el Teniente Pretiñe. Viendo que nada había que hacer en el Cuartel el Comandante Rawson les dijo a estos Oficiales y al Sargento que lo siguieran y salió a reunirse con Ariosa y los demás que lo estaban esperando- Resolvieron ir a la Policía, pero fueron imposibilitados a su llegada por los cantones establecidos”.<sup>9717</sup> Tomaron un carruaje y se fueron a Belgrano (Mendoza), para más tarde “...organizar fuerzas en San Martín y puntos del tránsito lo que realizaron con éxito. Me dejaron el cuartel los Oficiales Pertiné y Núñez- Se dejaron estar esperando hacer algo”.<sup>9718</sup>

Poco a poco, a estos oficiales leales vinieron a sumarse hasta doscientos (200) soldados que estaban de franco. Con ellos “...organizaron la defensa del cuartel oyendo el tiroteo por el lado de la Policía y Cárcel. Mesas, sillas, bancos todo utilizaron pues ya sabían que luego serían atacados. A las 3 y 30 poco mas o menos estando el Teniente 2º Don José Villarroel en el Gran Hotel, puesto preso de los sublevados con el Gefé de E.M. Comandante [Pastor] Marambio, y varios otros Gefes y Oficiales, “...aprovechó su oportunidad propicia, se encogió y huyó hacia su cuartel, el del 2 de Cazadores”.<sup>9719</sup>

De todas las Armas. "...Hicieron una heroica defensa los tres Oficiales mencionados y la tropa a sus órdenes. Pero fueron heridos muy gravemente Pertiné y Villaruel y levemente Núñez. Este último se distinguió de una manera notable y creo Exmo Señor que es tan acreedor al ascenso, como sus compañeros en esta brillante defensa".<sup>9720</sup> Tuvieron que ceder al número y rendirse, viéndose atacados por el frente y por retaguardia por fuerzas muy superiores. La defensa duró lo menos hora y media.

#### **H-V.- Previsión de Amotinamientos y Confusión de Fuego Amigo entre la tropa represora**

Cuando en febrero de 1905 los civiles (Lencinas, Romero, Ferrer) y los militares revolucionarios de Mendoza se rindieron y huyeron a Chile (Alfonso, Alvea, Alonso, Binaschi, Bravo, Correa, Covarrubias, Gómez, Ibáñez, Martínez, Orfila, Pérez Colman, Quellet, Varela), y por consiguiente también se habían rendido las clases y soldados subalternos, el Teniente Coronel Pastor Marambio pudo exhortar a estos últimos al cumplimiento del deber y evitar así a Mendoza sucesos trágicos semejantes a los amotinamientos ocurridos en Pirovano (Pcia. de Buenos Aires), diciéndoles "...que hasta cierto punto ellos no eran responsables de la traición, que habían cometido, inducidos por los oficiales que eran los verdaderos culpables".<sup>9721</sup>

Inmediatamente después de exhortar a las tropas, Marambio dejó un guardia para cuidar la Casa de Gobierno y ordenó al entonces Mayor Don Octavio Fernández, "...reuniera las tropas dispersas y las concentrara en el cuartel del 2 de Cazadores, poniéndose a las ordenes del Comandante Don Manuel Amaya que era el jefe de mayor grado y antigüedad; al Mayor Fernández de Castro le ordené ocupara la Comandancia de la Región con unos 40 hombres entre civiles y militares".<sup>9722</sup> Y al Teniente Manuel Abelardo Segura [26-13-A] y al Alférez [Manuel Augusto] Bermejo [27-58-A], Marambio les encargó de "...recorrer la ciudad con patrullas de 8 a 10 hombres de Caballería, a fin de dar a conocer la situación y hacer abandonar los cantones que aún estaban ocupados por revolucionarios, en las comisarías de Policía y Municipalidad (que hizo desalojar personalmente) y garantizar el orden público contra los excesos cometidos por la gente armada y dispersa que procedía impunemente al no estar aún regularizado el servicio público".<sup>9723</sup>

En seguida Marambio se trasladó al telégrafo y se dirigió al Coronel Antonio Tiscornia haciéndole "...conocer la nueva situación; a este jefe le mandé también un parte escrito sobre el mismo asunto, haciéndole saber que nos estábamos concentrando en el 2 de Cazadores".<sup>9724</sup> También Marambio hizo "...publicar un Boletín, a nombre del Comandante en jefe de la Región, [que] ha dado [a] conocer la nueva situación y disponiendo que las armas de la Nación fueran entregadas en el cuartel del 2 de Cazadores o en el arsenal hasta las 5 p.m., de ese día, después de la cual los que las retuvieran, serían sometidos a las responsabilidades de la Ley".<sup>9725</sup>

Habían transcurrido apenas tres cuartos de hora de la salida de Marambio de la Policía, "...cuando se presentó al cuartel del 2 de Cazadores el Mayor José E. Rodríguez con gran parte de los soldados de su cuerpo y la banda de música".<sup>9726</sup> En estas circunstancias, se dejaron oír "...dos disparos de cañón y el Mayor Fernández de Castro y las patrullas al mando del Teniente Segura y Alférez Bermejo (no recuerdo los dos o cual de ellos) me hicieron saber que tropas enemigas de las tres armas habían llegado y

emplazado a la altura de la Bodega Barraquero. El Mayor Castro pidió artillería y refuerzos. Sus tropas estaban desplegadas frente a la Comandancia”.<sup>9727</sup> No logrando explicarse “...qué enemigo podía ser el que se presentara por esa parte aún cuando no tenía conocimiento exacto de la situación general”, Marambio le mandó “...orden de contestar el fuego hasta no recibir orden expresa y dispuse se les remitieran dos piezas de artillería, y 20 hombres del 2 de Cazadores por pieza”.<sup>9728</sup>

Marambio ordenó que las patrullas “...reconocieran el presunto enemigo y llegaran a él, trayéndome a ser posible el nombre del jefe que mandaba esas fuerzas, al cual le darían a conocer que Mendoza estaba de nuevo en poder del Gobierno regular y, en el acto me adelanté con mi ayudante el hoy Teniente 1º Don Miguel A. Sánchez a reconocer la situación”.<sup>9729</sup> Pasando por la Comandancia de la Región, Marambio siguió “...por la calle San Martín en dirección a la Bodega Barraquero y, como a unos 600 metros, fui alcanzado por el entonces Cadete del Colegio Militar Don Narciso Laprida [35-96-G], que me dio cuenta de las fuerzas consideradas como enemigas venían mandadas por el Señor Comandante de la Región, General de División Ignacio Fotheringham, al cual le había hecho saber la nueva situación”.<sup>9730</sup> Acto seguido, Marambio se presentó al General y “...le dí cuenta de todo lo ocurrido y de las órdenes que acababa de dar, respecto a la entrega de las armas, y noticias transmitidas al Coronel Tiscornia, cuyas medidas aprobó”.<sup>9731</sup>

## **H-VI- Conclusiones**

La imposición de un orden burocrático pretoriano ocultaba también, como su contrapartida insurreccional, una profunda desestabilización de la relación de fuerzas que se daba entre diversos actores del tablero dirigencial. Sin duda, el desarrollo tecnológico y la consiguiente expansión comunicacional favorecieron la efectividad intimidatoria de la represión. Este incremento intimidatorio se observa claramente al comparar el éxito militar de la represión de 1905 con respecto a la de 1893, así como también al cotejar el éxito militar de la conquista del Chaco en 1911 con respecto a las compañías militares de las décadas de 1870 y 1880.

## **Capítulo- IV-C-9 Corporatismo militar y transición a un orden burocrático-pretoriano.**

### **Índice del Capítulo IV-C-9**

#### **I.- El Corporatismo Militar y sus pautas en la transición a un Orden Burocrático-Pretoriano.**

- I-I.- La jerarquía subvertida
- I-II.- La disciplina como obediencia pasiva o reflexiva.
- I-III.- Castigos y sentencias, y sus derivaciones trágicas
- I-IV.- El liderazgo como conducción tradicional o moderna.
- I-V.- El honor militar como discriminatorio del honor civil.
- I-VI.- El espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador.
- I-VII.- Conclusiones.

## Palabras Claves

Bonapartismo--cesarismo—corporatismo--credo Prusiano--disciplina militar--fuerzas morales--honor civil--honor militar—honor familiar—Honor tribal—Honor dinástico--Legado napoleónico--Liderazgo como conducción autoritaria o democrática—militarismo--militarización prusiana--obediencia pasiva o reflexiva—orden burocrático-pretoriano—pretorianismo-virtud militar.

## Keywords

Bonapartism—bureaucratic-pretorian order--caesarism—corporatism—militarism--military discipline--moral forces--civil honor--military honor—family honor—tribal honor--napoleonic legacy--leadership as authoritarian or democratic—military virtue--Praetorianism--Prussian militarization--passive obedience-

## I.- El Corporatismo Militar y sus pautas en la transición a un Orden Burocrático-Pretoriano.

En primer lugar, las normas éticas variaban según la teoría de la autoridad en que se fundaran; y dicha teoría varió también en el tiempo y entre civilizaciones, entre etnias y naciones, entre tipos de estado, y aún entre clanes familiares.<sup>9732</sup> Variaban según que se tratara de un estado colonial o uno independiente; un estado feudal, uno tradicional de antiguo régimen o uno moderno; y entre estos últimos variaban según que se tratara de un estado patrimonial, uno oligárquico-pretoriano, o uno democrático-popular.<sup>9733</sup>

Si nos atenemos a lo manifestado por el Parte de Guerra remitido en 1887 por el Teniente Coronel José María Uriburu, la influencia moral en el ejército variaba según que se considerara al ejército de línea o a la guardia nacional; y también variaba entre la tropa según que se tratara de un voluntario, un enganchado o un destinado.<sup>9734</sup> Para la notable sensibilidad receptiva del Capitán J. M. Uriburu "...abandonar la familia y el hogar por el resto de la vida; dejar sus intereses y sus hijos, por un tiempo indeterminado, por más ignorante que se suponga a un hombre, por más destituido de sentimientos afectuosos, la ausencia y el recuerdo batallarán su espíritu en las horas de descanso".<sup>9735</sup> Para Uriburu, muchas veces, en su dolor íntimo y recóndito, el soldado voluntario "...tendrá que ocultar a las extrañas miradas, esas lagrimas que no asomarán a sus ojos, inundarán su alma. En las fronteras, en los desiertos de nuestro país, sin medios de comunicación, porque ese hombre no sabe leer ni escribir, su espíritu vagará por sus lares y le traerá la nostalgia".<sup>9736</sup>

Quince años más tarde, para el Presidente Luis Sáenz Peña (1892-93), la moral de los oficiales variaba geográficamente según que estuvieran destinados en los centros urbanos o en la campaña. Sáenz Peña sostenía que los destinados en unidades localizadas en centros urbanos sucumben a las tentaciones políticas, razón por la cual es preciso llevarlos a las fronteras limítrofes.<sup>9737</sup> Estas proposiciones, meramente espaciales, engendraron toda una polémica sobre doctrina militar y sobre codificación de la disciplina, que influida por las concepciones teóricas acerca de la "revolución desde arriba" impartidas por el Bismarkismo Prusiano, culminaron recién otra década más tarde, con la promulgación del Código de Justicia Militar o Código Bustillo (1898), la Ley de Servicio Militar Obligatorio (1901), y la eliminación de las Guardias

Nacionales (1902).<sup>9738</sup> Dicha discusión sobre doctrina militar y el tipo de autoridad y disciplina subyacentes a la misma habría comenzado en Buenos Aires a fines de la década del 80, en medio de la expansión colonialista de las metrópolis europeas y cuando aún no arreciaba el peligro de un enfrentamiento con Chile, y dicha discusión se había centrado en una tríada ética corporativa compuesta por las virtudes o fuerzas morales del honor, la disciplina y el liderazgo, cuyos respectivos límites e intensidades han estado siempre en continuo regateo o renegociación.<sup>9739</sup>

Las virtudes o fuerzas morales, en sus relaciones con las instancias de autoridad y de poder en la esfera militar, es decir la disciplina, el honor y el liderazgo, han venido siendo manipuladas por diferentes tendencias ideológicas e intelectuales.<sup>9740</sup> La primera interpretación significativa fue la que los epígonos de Napoleón Bonaparte le inculcaron con su empleo de las fuerzas morales (Jomini); en segundo lugar la que en las humanidades y en las ciencias sociales provocaron las disquisiciones del positivismo socio-darwinista (Spencer, Seignobos), y el proto-institucionalismo (Veblen); y en tercer lugar las elaboraciones del funcionalismo (Parsons), el estructuralismo (Levy-Strauss), y el neo-institucionalismo (Skocpol). Fue con la irrupción de un abordaje crecientemente interdisciplinario, desde la antropología, la psicología, la historia, la sociología, la ciencia política, las ciencias de la educación y últimamente las ciencias de la comunicación, que las fuerzas morales dejan de explicarse en función de características invariables e intransferibles para pasar a concebirse como resultado de transformaciones e interacciones sociales, del lugar de la conducta y la acción humana, en el seno de un sistema complejo compuesto por diferentes subsistemas, esferas, niveles y jerarquías.<sup>9741</sup> Se plantea entonces el problema de cómo trasponer los estudios sobre las fuerzas y deformaciones morales (disciplina, honor y liderazgo), practicados en unidades de pequeña escala, al estudio de las mismas pero en las grandes unidades político-administrativas (ejércitos, estados, iglesias).<sup>9742</sup>

En la profusa serie de publicaciones habidas en Buenos Aires sobre el tema de la disciplina, el honor y el liderazgo que vino a reemplazar primero el influjo de las obras del iluminista Conde Jacques-Antoine de Guibert, y más luego la del napoleónico Barón Antoine Jomini debemos mencionar en primer lugar el libro del Jefe de la Escuela Militar de México General R. S. Benavides, titulado *La Prusia Militar*.<sup>9743</sup> En segundo lugar, los comentarios, artículos y libros del historiador militar prusiano Hans Delbrück, comentados en el periódico *El Tiempo*, y los del general de brigada Alberto Capdevila, titulado “*Táctica para las Maniobras y el Combate de la Infantería*” (fundado en el folleto *Elogio de la Guerra* de Mathieu Brialmont y en los *Principes de la Guerre* de Ferdinand Foch), que el gobierno hizo imprimir en 1893 y distribuyó luego en todos los regimientos.<sup>9744</sup> Y en tercer lugar, las transcripciones que de las revistas militares europeas hacían diversos periódicos porteños, entre ellos por *El Tiempo* y la pluma de su director Carlos Vega Belgrano.<sup>9745</sup>

Mientras que en la prensa periódica se discutía intensamente las comparaciones con las experiencias francesas, alemanas y norteamericanas, y los pormenores disciplinarios y patrióticos desatados en Francia por el Caso Dreyfus, la Cámara de Diputados trató en julio de 1894 un proyecto de ley para premiar a Capdevila por su libro.<sup>9746</sup> En la sesión de diputados del 1º de julio de 1894 se mencionan los trabajos de Capdevila y de Rostagno como las dos obras más importantes para la formación de los militares argentinos. El diputado Juan Agustín García sostuvo que: "...Nuestro ejercito era quizá el único del mundo que no tenía táctica moderna de infantería como no la tiene aún de

artillería pues ésta usa el reglamento español de hace 30 años, no obstante las modificaciones fundamentales que el arma ha tenido en estos últimos tiempos, ni tampoco de caballería puesto que se rige por una traducción mutilada del antiguo reglamento francés, inadecuada en la actualidad, según opinión de distinguidos jefes".<sup>9747</sup>

A propósito del libro de Capdevila hay otras intervenciones parlamentarias. En la sesión del 8 de agosto participa el ex militar mendocino y distinguido intelectual positivista Agustín Álvarez (5-2-I), quien relaciona la obra de Capdevila con la orientación prusiana para el manejo de armas.<sup>9748</sup> En la sesión del 27 de agosto de 1894, se informa la sanción de la ley que ordena remunerar de manera especial al general Capdevila por la redacción de la citada obra.<sup>9749</sup> Habría también que tener en cuenta cómo el impacto de la segunda revolución industrial así como del denominado Caso Dreyfus, desatado en Francia, que estalló en 1894, contribuyeron a desplazar --en la educación militar vernácula-- la orientación francesa (Guibert, Jomini, Brack) por la prusiana (Moltke).<sup>9750</sup> Es en ese contexto histórico que debe valorarse el difícil deslinde que se gestó en el derecho militar comparado entre lo penal y lo propiamente disciplinario (Díaz, 1883), actualmente desarrollado por intelectuales suscriptos a la teoría de la organización: Jiménez Jiménez (1987), Lorenzo Ponce de León (2003), y Jarnés Bergua (1982), el prologuista de la obra de Amos Perlmutter.

Pero para teorías recientes, sobre conducción del personal militar (Janowitz, 1964; Hersey y Blanchard, 1982), los factores claves que diferencian a los conjuntos de miembros más que de índole moral son de naturaleza psicológica, entre ellos: el liderazgo, la motivación, la disciplina, la identidad y la creatividad profesional.<sup>9751</sup> Por ello, este noveno capítulo lo dividiremos en cinco (5) apartados, empezando con el análisis de las disquisiciones sobre la disciplina militar, contemplada tanto como obediencia pasiva como reflexiva; para a renglón seguido estudiar los castigos y sentencias, y sus derivaciones trágicas, el liderazgo como conducción tradicional o moderna; y el honor militar como discriminatorio del honor civil; y finalmente, indagar el espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador.

### **I-I.- La jerarquía subvertida**

La exaltación del general Roca a la presidencia de la República, a despecho de la voluntad de los pueblos que en Barracas, en Olivera y en Puente Alsina protestaron con las armas en la mano "...de la imposición de que quería hacerles y les hizo victoria el doctor Avellaneda, fue la primera etapa andada en el camino de la corrupción política".<sup>9752</sup> Aunque vencidos en el campo de batalla, los hijos de Buenos Aires, que por ese entonces resumía el sentimiento público, "...no cesaron en su lucha opositora contra la situación que encabezada por el general Roca, había llegado al poder después de pisotear dos mil cadáveres de argentinos".<sup>9753</sup>

Para resistir a la opinión, el denominado héroe del desierto "...llamó a su lado al militarismo, al que prestó todo género de consideraciones y consintió toda clase de desmanes, exigiéndole, en cambio, que le apuntalara con sus armas en la presidencia".<sup>9754</sup> Ese día, puede decirse, "...se abrió al elemento militar las puertas de la política que siempre debieron permanecer cerradas para él, y quedaron minados en su base los cimientos de la disciplina, sobre la cual descansa el poder de los ejércitos".<sup>9755</sup> A los oficiales y soldados, cuya misión constitucional es la de defender la integridad de

la patria y la pureza de las instituciones, "...se les convirtió en guardias pretorianas, y, bajo las promesas de un ascenso, se les hizo desempeñar cometidos que hubieran coloreado de carmín el rostro de los genízaros del bajo imperio".<sup>9756</sup>

Al prostituir el General Roca las instituciones militares "...autorizaba a sus miembros para que se creyeran con derecho a ser los dueños de la situación, puesto que disponían de la fuerza que levantaba o derrocaba gobiernos, según las conveniencias del presidente de la república. Por eso Juárez Celman, que llegó a las alturas del mando en brazos de los batallones de línea, viose obligado a recompensar a los que habían contribuido tan eficazmente a su exaltación al mando".<sup>9757</sup> Los galones y las charreteras "...se repartieron, entonces, a granel, y se ascendió a los cargos superiores inmediatos a jefes que no tenían más méritos que ser favoritos del gobierno, pues no se hallaban ni en las condiciones exigidas por la ley de la materia para ascender, ni se habían distinguido por sus conocimientos".<sup>9758</sup>

Durante el gobierno de Sáenz Peña se operaron "...cambios notables en el ejército, no en el sentido de una reacción favorable, sino en el del agravamiento de los hechos en que él había intervenido en las anteriores administraciones".<sup>9759</sup> Convencido de la debilidad senil del primer mandatario y engreído de su poder, el militarismo se le impuso, al extremo de que cuando Sáenz Peña nombró como Ministro de Guerra y Marina al General Garmendia, que se había desempeñado desastrosamente como Director del Arsenal de Guerra, fue suficiente que algunos jefes "...le presentaran sus renuncias, para que el ex presidente dejara sin efecto ese nombramiento".<sup>9760</sup> Un año más tarde, en 1895, al Doctor Uriburu le empezó a pasar "...otro tanto que al Dr. Sáenz Peña, y el país acaba de presenciar el espectáculo de que el general [Francisco] Bosch y el contra-almirante [Daniel] de Solier le hayan puesto en la picota del público desprecio, y el uno directa y el otro indirectamente le hayan culpado, en términos violentísimos, del desquicio existente en el ejército y en la marina".<sup>9761</sup>

Lo sucedido demostraba "...que la autoridad moral del presidente es nula, pues de otra manera no se explica el que dos jefes caracterizados, como aquellos, se hayan atrevido a enrostrarle sus malos procederes".<sup>9762</sup> Era cierto que el Dr. Uriburu había ordenado la inmediata prisión de esos militares, "...pero no lo es menos que con esas medidas de represión, solamente, no se va a exterminar la anarquía que fomenta en el ejército".<sup>9763</sup>

Los autores de dichos documentos (Bosch y Solier), comprendiendo la falsa posición en que los colocaban las comunicaciones provocativas endilgadas al Presidente, "...se han esmerado a escusarlos en móviles de patriotismo, que respetándolos en su ingenua sinceridad, no pueden sin embargo aceptarse como un criterio conveniente para las relaciones regidas por la obediencia y el acatamiento severo e inexorable que impone la subordinación militar".<sup>9764</sup>

Las comunicaciones dirigidas al Presidente por Bosch y Solier, no fueron piezas regulares "...en las que respetuosamente se espongan deficiencias administrativas o se propongan medidas, y reformas; son recriminaciones, denuncias, verdaderas acusaciones, en que se delata ante el país, los errores, las torpezas, la indolencia criminal, que según ellos, acusa la conducta del superior".<sup>9765</sup> La nota del contralmirante Solier, podría servir "...de cabeza de proceso a un juicio político, por la gravedad de las imputaciones que hace al presidente y sus consejeros, y nos parece que por acendrados que sean los móviles patrióticos que puedan inspirar esa denuncia, no cuadra bien en

boca de un subalterno, cuyo deber más elemental es el respeto al país y la disciplina, rendido en la persona del primer magistrado”.<sup>9766</sup> No era posible para Grapho, el editorialista del periódico *El Diario*, “...aceptar esta tutoría que, a título de patriótico, relajaría todos los resortes acerados que dan estructura a la institución militar, y sin los cuales no habría mando, ni obediencia, ni disciplina, quedando las más eficientes virtudes de la milicia, entregadas a estas corazonadas en que los jefes de más elevada graduación, haciéndose árbitros y censores de la conducta de sus superiores, se despacharían a su gusto e inspiración en estas comunicaciones que revisten la forma odiosa de solemne difamación”.<sup>9767</sup>

Si el presidente de la república faltaba a sus deberes; “...si su indolencia o su torpeza compromete la conservación y la seguridad nacional, no son sus subalternos los que deben denunciarlo, ni formular las imputaciones que sirven de cabeza de proceso; la constitución le ha dado acusadores y jueces naturales, que son los únicos que pueden permitirse y avocarse el conocimiento de sus faltas, delitos o deficiencias”.<sup>9768</sup> No era posible, pues, “...sin subvertir las más elementales nociones de la disciplina, y sin quebrantar el régimen de las responsabilidades constitucionales, consentir, que un soldado se cuadre delante de la más alta investidura nacional, y le enrostre lo que él en su juicio, apasionado o sereno, crea que es censurable”.<sup>9769</sup>

Dicho criterio subversivo, aplicado en toda la extensión a que se presta, “...arribaría a relajar toda obediencia y disciplina; y si un contralmirante se avoca estas prerrogativas de disenso o condenación a los actos del presidente de la república, daría igual derecho a un grumete para disentir e impugnar en nombre de sus sentimientos patrióticos, las disposiciones del jefe superior de la escuadra. La disciplina es una lógica de acero, cuyos eslabones vinculan del último soldado al jefe de más elevada jerarquía”.<sup>9770</sup>

Las mismas consideraciones de Grapho eran extensivas a la dimisión del general Bosch, que no era una renuncia, “...sino una denuncia, una protesta contra los actos del ejecutivo, formulada a mérito de una dualidad incomprensible con el criterio inflexible de la ordenanza, que no reconoce esa entidad ambirostra del soldado y ciudadano, que según el dimitente, daría al militar, la opción facultativa de obedecer, cuando lo crea conveniente, o de alzarse contra su superior cuando estime que su conducta no se ajusta a su juicio y a sus sentimientos patrióticos”.<sup>9771</sup> La teoría de esta ambigüedad, de este desdoblamiento, no podía ser más peligrosa “...para la conservación del gobierno y el imperio nacional y ponderado de las instituciones; ella nos pondría a un paso de los pronunciamientos y los alzamientos de cuartel, operados en nombre de esta vindicta cívica, de esta conciencia nacional, que el soldado, según el Sr. Bosch, está llamado a interpretar, constituyendo así al militar y al ejército, en tribunal armado y censor formidable de las responsabilidades de los poderes públicos”.<sup>9772</sup>

Estas doctrinas subversivas no podían ser consentidas “...ni dejar que se propalen sin la merecida refutación; no hay tales soldados-ciudadanos, ni tal democracia militar; ni en el concepto de la constitución, ni en el de las leyes que rijen la existencia de la fuerza armada de la nación, cuya virtud fundamental es la obediencia pasiva y el absoluto respeto jerárquico, sin lo cual, la noble misión que le está deparada defraudaría toda la confianza del país, que le ha entregado en sagrado depósito su decoro, su soberanía y su integridad”.<sup>9773</sup> Las responsabilidades políticas y legales de los poderes constituidos,

“...no es el ejército, ni los militares, de cualquier rango o posición los que deben vindicarla, sin quebrantar la disciplina que es la ley suprema del soldado”.<sup>9774</sup>

Así, como los jefes mencionados, denuncian y condenan al ejecutivo, podrían otros hacerlo mañana, “...con las deliberaciones del congreso, y sus disentimientos podrían fundarlos en causas más o menos nimias, según fuera su criterio, su juicio o su interés personal”.<sup>9775</sup> Ya se habían anunciado otras renunciaciones, inspiradas en la camaradería militar o en otros móviles poco respetuosos para la ordenanza; “...y por este camino se va mal, y la opinión ha de acompañar decididamente a la presidencia en toda medida que tienda a corregir estos avances e irrespetuosidades, que podrían conducirnos a extremos deplorables, pues por estos medios subversivos, en vez de proveer a la regular y debida organización del ejército, podríamos caer en los pronunciamientos militares, en que los jefes de los batallones, erigidos en comicio armado, se pronunciaron en veredictos fatales sobre la corrección o el acierto de las deliberaciones del gobierno, constituyéndose en tutores de la opinión y providencia suprema de la república”.<sup>9776</sup> El presidente debía proceder “...con tacto y energía, a sofocar en ciernes estos síntomas peligrosos, seguro de que el país lo acompañará en el propósito de este equívoco criterio de entender la obediencia militar”.<sup>9777</sup>

## **I-II.- La disciplina como obediencia pasiva o reflexiva.**

La noción de obediencia en los ámbitos militares es tan vieja como la historia de la humanidad.<sup>9778</sup> Primero fueron los griegos con la falange hoplita y luego los romanos con la legión quienes canonizaron la noción de disciplina.<sup>9779</sup> Con la edad media, el desplazamiento de la infantería por la caballería reintrodujo el individualismo y erosionó la concepción de la disciplina. Más luego, lo que ayudó al pasaje del ejército feudal o medieval al moderno no fue la aplicación de la pólvora sino la disciplina que ejercitaban los lansquenets (infantes mercenarios), originalmente conducidos por Guillermo de Orange.<sup>9780</sup> La orden, según Milgram (1974), simplifica el mundo, y hace que acatar requiera menos esfuerzo y concentración que desobedecer.<sup>9781</sup> El acatar la autoridad, a sólo instancias del disciplinamiento, ahogaba toda posibilidad de debate y de crítica, la antesala de un pathos autocratizante y anti-cientificista.

En oportunidad de la Revolución del 90, y con motivo de la disolución de los regimientos y cuerpos que participaron de aquel cruento como histórico evento, se introdujo la discusión sobre las nociones de disciplina y de obediencia.<sup>9782</sup> Un periodista del periódico *El Diario*, que firmaba bajo el seudónimo de Yaro, incorporó la distinción entre obediencia pasiva y obediencia reflexiva, reproduciendo fragmentos de un discurso sobre la disciplina que posiblemente deben haber pertenecido a Bartolomé Mitre, quien a su vez lo debe haber escuchado de boca de Garibaldi. Dichos fragmentos textualmente rezaban: “...La obediencia pasiva, se dice es la ley del soldado: mentira; En tiempos de Felipe II, en tiempos de la Inquisición, cuando todo llevaba el sello de lo que había sido el Imperio Romano en sus horas de degradación, cuando lo absorbía todo el señor del terruño; cuando no había mas que el rey, la horca y el cuchillo, entonces la obediencia era pasiva”.<sup>9783</sup> Pero después de “...la emancipación del espíritu humano [la Ilustración], la obediencia fue reflexiva y no pasiva. Es pasiva solamente cuando el superior dice: ¡Allí! y cuando la muerte está delante; entonces no se discute, se obedece; pero cuando el peligro no es de muerte, cuando el peligro es de algo peor que la muerte, cuando el peligro puede ser la pérdida de todo lo que hemos conquistado, entonces no

hay obediencia reflexiva: hay algo mejor que esto, el derecho de protestar contra los tiranos, sea cual fuere la forma que dominen”.<sup>9784</sup> Un año y medio más tarde, en enero de 1892, Deolindo Muñoz, director de *El Municipio* (Rosario), expresaba que la disciplina “...no se crea con el terror: hay en todo cuerpo armado ideales de nobleza y caballerosidad, cuya supresión equivale a la disolución del cuerpo mismo, aun prescindiendo del sentimiento patriótico, sin cuyo auxilio no hay ejército nacional en ninguna parte, pues solo es dable a los tiranos rodearse de mercenarios infieles”.<sup>9785</sup> Esa actitud de rodearse de mercenarios, corrompidos con el favoritismo en los ascensos, es lo que prevalecía en ese entonces. El grupo usurpador del poder liderado por el Gral. Levalle pretendía, a juicio de Muñoz, “...realizar el absurdo de conservar adicto a la tiranía un ejército, compuesto de oficiales demócratas por tradición y por educación y de soldados que recuerden las hazañas de la epopeya revolucionaria, como la primera razón de ser de la patria”.<sup>9786</sup>

Pero con las sucesivas amnistías decretadas a raíz de las purgas militares practicadas con motivo de las revoluciones radicales (1890 y 1893), muchos parlamentarios partidarios del antiguo régimen (oligarquía del 80) comenzaron a argüir que la disciplina iba a verse perjudicada, con las consiguientes derivaciones del motín.<sup>9787</sup> Sin embargo, como se ha tratado previamente, en las expresiones del periodista de *El Diario*, que firmaba con el seudónimo de Yaro, las tropas revolucionarias “...libraron la dirección y el mandato de la insurrección a un grupo de hombres civiles, constituidos en gobierno provisorio, y cuando su actitud estaba así regularizada, recién entonces, obedeciendo órdenes, descargaron sus armas sobre los sostenedores de la situación, en duelo franco, ¡frente a frente! Cuando y en que parte del mundo los motineros de cuartel han procedido de ese modo?...”.<sup>9788</sup>

Y años después, a fines de la década de 1890, en plena confrontación virtual con Chile,<sup>9789</sup> en el seno del ejército Argentino la discusión central dejó de girar alrededor de la obediencia reflexiva, que tenía por eje a la disciplina mental, y pasó a circunscribirse casi exclusivamente a una disciplina puramente formal, centrada en la obediencia pasiva, en el honor y en el liderazgo, en los rituales horarios y ceremoniales o de etiqueta, y más específicamente en los límites entre lo disciplinario y lo penal. En esta tarea se destacaron las disertaciones y escritos del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, y de los Coroneles Manuel Manrique, Pablo Solari y Juan J. Comas, todos ellos ex revolucionarios Radicales, y la del egresado del Colegio Militar Capitán Evaristo Sánchez Negrete (21-76-I).

Tanto Manrique como Solari fueron revolucionarios radicales, pues cuando revistaron como Mayores del 9 de Infantería en los años 1891 y 1892 estuvieron presos en el monitor **Los Andes**, anclado en Zárate (comandado por el Capitán de Fragata Emilio Casavega).<sup>9790</sup> El Cnel. Comas, cuando Subteniente en las filas del 5º de Infantería participó en la Revolución del 90, y cuando Teniente al mando de un batallón del 3 de Línea también participó en la Revolución de 1893, que aconteció en la ciudad de Santa Fé.<sup>9791</sup> Fue más tarde célebre por haber ultimado en un aparente duelo ocurrido en la Escuela Superior de Guerra al Coronel Arturo Macedo (quien ponía en tela de juicio su virilidad).<sup>9792</sup> El Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, sobrino del célebre dirigente radical Coronel Angel Blanco, participó activamente en la Revolución radical de 1893 en Corrientes, a las órdenes del Dr. Manuel F. Mantilla.<sup>9793</sup> Pero todos ellos tienen en común, haber boicoteado la revolución de 1905. En ese sentido, el Capitán Evaristo

Sánchez Negrete [21-76-I], en oportunidad del levantamiento del 9 de Infantería en Santa Fe, el 4 de febrero de 1905, se resistió violentamente.<sup>9794</sup>

La táctica tiene, a juicio del Capitán Juan J. Comas, principios inmutables, pero estos varían "...según las condiciones del terreno, las armas, la educación y composición de las tropas y hasta del carácter [o liderazgo] del Jefe que las manda. La actitud del Jefe es lo más importante y difícil, hay dos opiniones respecto a la actitud que debe reunir, unos dicen que es necesario que se halle en todas partes animando y dirigiendo a los soldados y otros que debe concretarse a un absoluto quietismo [o impasibilidad], pues no hay que olvidar que las tropas están dotadas de sentimientos y puede mucho en sus emociones la valerosa conducta del jefe".<sup>9795</sup>

Casi diez años después de su intervención en la Revolución de 1893, en enero de 1902, el Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco, confiesa que bajo la dirección de jefes --incapaces de inculcar grandes conocimientos debido a motivos culturales-- que tenían verdadera pasión por la disciplina "...aprendí a observarla siempre, arraigándose en mí la creencia de que ella está sobre todo, pues es la base en que se afianza la grandeza del ejército y la majestad de la Nación. Como prueba basta recordar las legendarias campañas de la independencia y la conquista de nuestros inmensos territorios, en que siempre fue el alma la férrea disciplina de nuestros soldados".<sup>9796</sup>

La disciplina es no sólo de indiscutible utilidad en un ejército, sino que para Arbó y Blanco es "...absolutamente imprescindible, pues sólo poseyéndola sólidamente, se halla una tropa en condiciones de arrebatar victorias, aunque fuese a cambio de torrentes de sangre, o de soportar con entereza los reveces que sobrevengan. Unificar las voluntades de todos los hombres de una agrupación a una sola voluntad que los dirija; y dar a sus aspiraciones un ideal general, es el objeto de la disciplina. Y mediante esta, esa inmensa y complicada máquina (que se llama ejército) funciona con regularidad, tomando un movimiento de conjunto armónico".<sup>9797</sup>

Para cada individuo la disciplina debe reducirse, "...al cumplimiento exacto de sus deberes y a las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos, sin entrar jamás a considerar si están bien o mal impartidas, pues no es el encargado de clasificarlas, y por el contrario, debe prestar obediencia ciega, siempre que no esté reñida con el honor".<sup>9798</sup> Y, como dice al respecto el General Capdevila: "cuando se encuentre el subalterno en contradicción de opiniones con su superior, deberá desconfiar mas bien de las propias, que dejar de cumplir con su deber, pensando que una orden mal dada, podrá valer hasta un presidio para el superior que la hubiese dado, y una estatua al subalterno que la cumpla heroicamente".<sup>9799</sup>

Es pues --para Arbó y Blanco-- la disciplina el "...principio vital de los ejércitos y a la vez la valla que se opone a las empresas invasoras de los países sedientos de expansión y de conquista. No olvidemos que solo así, se mantuvieron grandes los pueblos de la antigüedad y que decayeron desde que descuidaron este principio fundamental".<sup>9800</sup>

La obediencia en sumo grado "...modifica y acalla las pasiones, encarna la abnegación, despierta y fortifica el patriotismo, y lejos de rebajar y deprimir a quien la observa, lo engrandece y dignifica".<sup>9801</sup> La disciplina pasiva, dice otro autor, "...es la primera de todas las virtudes militares, que es el cumplimiento militar mismo y la consagración de las leyes del verdadero honor. Consiste la disciplina, en el respeto y sumisión al

superior y en el cumplimiento a las leyes militares, a las del honor y a las del patriotismo, pues esa obediencia máxima no empequeñece el carácter, no debilita las energías, no mengua los arranques varoniles ni intimida a quien la observa sino que por el contrario, retempla su carácter y su espíritu y en todos los momentos está convencido de su valor, de su grandeza y de su fuerza”.<sup>9802</sup>

Para enseñar y mantener la disciplina, concluye Arbó y Blanco, “...no basta la disertación diaria que haga en las academias el superior jerárquico; y más que esto influye poderosamente en el ánimo del subordinado el buen ejemplo del superior, quien con su moralidad y sumisión, le inculca prácticamente ese principio de vital importancia”.<sup>9803</sup>

Finalmente, siguiendo un orden lógico y racional, el Mayor Pablo Solari observa que, para mandar “...es necesario que haya quien obedezca o ejecute, y como hemos sentado como principio natural el mando, de ahí entonces la obediencia o la subordinación, de manera que uno y otro se complementan, el primero no puede existir sin el segundo y este último se elimina por consecuencia, no existiendo el aquel”.<sup>9804</sup> Si ambos, el mando y la obediencia se complementan, “...si el uno entraña la idea del otro, es natural que ambos obedezcan a un mismo impulso, que tengan igual origen, igual principio superior y que si el mando rompiendo sus límites fijados se lanza al terreno de lo tiránico y de lo injusto, saliendo de lo normal es lógico también que desaparezca la obediencia produciéndose el desequilibrio derrumbase la lógica y la razón de las cosas y dando lugar entonces a las situaciones anormales”.<sup>9805</sup>

### **I-III.- Castigos y sentencias, y sus derivaciones trágicas**

Los castigos en el fuero militar fueron ampliamente discutidos durante el Renacimiento europeo, y en especial en las obras de Maquiavelo y de Hobbes.<sup>9806</sup> Con las Reformas Borbónicas, en el siglo XVIII, la corona española instituyó para su gobierno y sus posesiones ultramarinas diversas penas en las denominadas Ordenanzas Militares.<sup>9807</sup> En Prusia, luego de la derrota de Jena (1806), el ejército abandonó el castigo corporal arbitrario, pues la tropa ya no recibía trato de súbditos sino de ciudadanos.<sup>9808</sup> Y en la América Latina, con la revolución de independencia, algunos de dichos países adoptaron sus propios regímenes jurídico-militares.

Pero en Argentina, si bien existía una jurisprudencia sobre medidas disciplinarias y penas impartidas en los ejércitos revolucionarios, hasta fines del siglo XIX, aun no se había redactado un Código de Justicia Militar que abundara sobre los delitos y las penas estrictamente castrenses.<sup>9809</sup> Por ese y otros motivos, se acumulaban en los regimientos del Ejército y en los establecimientos de la Armada numerosos presos que aguardaban ser juzgados y sentenciados.<sup>9810</sup> Esa congestión de presos y arrestados en las unidades militares ocasionaba todo tipo de dificultades, desde administrativas hasta financieras.<sup>9811</sup> La impaciencia había llegado a tal extremo que a través de la prensa diaria se recomendaba la adopción de las cortes marciales británicas, conservando de los códigos locales la parte puramente penal.<sup>9812</sup>

Las sentencias de los Consejos de Guerra eran publicitadas en las órdenes generales del Estado Mayor, pero lamentablemente sus expedientes han desaparecido debido a las prescripciones de baja al cumplirse cuarenta y cinco años desde su terminación.<sup>9813</sup> Con

la implosión del prusianismo el rigor de los procesos y las penas aumentó considerablemente.<sup>9814</sup> La mayor parte de dichas sentencias obedecían a motines, insubordinación a mano armada, homicidios, duelos, deserciones, abusos de poder, torturas, sodomías, etc.<sup>9815</sup> En ocasiones, los motines de regimientos enteros provenían del maltrato a la que era sometida la tropa.<sup>9816</sup> La tropa destinada en la frontera estaba "...eternamente a caballo, ya haciendo la policía de la frontera, ya en persecución de indios o desertores, ya rondando sus propias caballadas o en servicios anexos a su misión, a los tres meses de haber recibido el último vestuario está desnudo, porque no hay paño que tal uso resista".<sup>9817</sup> Por lo general, "...duermen en el suelo sobre un pobrísimo recado de cueros de carnero, de su propiedad particular, porque el gobierno le da solo una despreciable manta para cama. ¡El soldado en campaña no cuenta con una tarima donde recostar el fatigado cuerpo! No se le dan cepillos, no se le dan útiles de limpieza, como tampoco se le dan medias para resguardar el pie de la nieve de la cordillera, que huella a cada momento!".<sup>9818</sup>

También los actos de violencia y crueldad procedían de las comisiones enviadas al interior del país con el fin de lograr el enganche de nuevos reclutas para el ejército.<sup>9819</sup> Más adelante, se estudiará el caso de ejecuciones originadas en insurrecciones de naturaleza política. En otras oportunidades, cuando se encararon movilizaciones de campaña, se produjeron enfrentamientos entre los mismos cuadros de oficiales, o entre oficiales y suboficiales, muchas veces ocasionados por un mal entendido concepto del orden, el honor y la jerarquía.<sup>9820</sup> Naturalmente, cuando éstos devinieron en sucesos trágicos repercutieron hondamente en la conciencia colectiva de la institución armada.<sup>9821</sup> También se produjeron pérdidas mortales por no haberse precavido en las movilizaciones el uso de munición de fogeo.<sup>9822</sup> Y en otras ocasiones, los crímenes obedecían a motivaciones sentimentales, tales como los celos por amores contrariados. En estos casos, cuando el victimario era inmolado en el altar de la justicia castrense, solía convertirse en ídolo popular.<sup>9823</sup>

Como los castigos impartidos por las autoridades castrenses se materializaban en los propios regimientos esto daba ocasión a escenas de martirio propias del medioevo.<sup>9824</sup> En la Marina de Guerra y también en el Ejército subsistían hasta fines de siglo las penas de azotes, que se aplicaban durante varios días consecutivos, a son de dianas y en presencia de la tropa y/o la tripulación formada, y a consecuencia de los cuales se pasaba a los castigados a la enfermería.<sup>9825</sup> En casos de mayor gravedad, y por carecerse de enfermería, se enviaba a los castigados enfermos o heridos a los hospitales de la zona correspondiente.<sup>9826</sup> También se aplicaban las penas de grilletes, que habían desaparecido en la mayor parte de los ejércitos del mundo.<sup>9827</sup> Hasta tanto se inauguraron las instalaciones de presidio en la Isla de los Estados (Atlántico Sur) el cumplimiento de las penas era practicado en las propias unidades militares.<sup>9828</sup>

#### **I-IV.- El liderazgo militar como conducción tradicional o moderna.**

A diferencia del liderazgo moderno, racional o burocrático, que es individualista, republicano y democrático; el liderazgo tradicional, pre-moderno o pre-burgués, era patriarcal, patrimonial, estamental, prebendario y profundamente autoritario.<sup>9829</sup> Por ello quienes participan del liderazgo moderno entienden que el liderazgo militar guarda resabios de un liderazgo profundamente tradicional, donde si bien las dotes y fuerzas morales son adquiridas, las características socio-carismáticas tales como las del

caudillismo y las dignidades individuales como la del honor son mayormente heredadas.<sup>9830</sup> Sin embargo, últimamente, el trabajo de Fuente (2001) revela como las dotes carismáticas fueron el producto de una construcción histórica individual, que se fueron elaborando desde muy abajo en la estructura social.

Entre las características invariables e intransferibles del liderazgo militar o guerrero, estudiadas por autores no influidos por el positivismo, estaban las fuerzas, virtudes y dotes morales y carismáticas (caudillescas), tales como la impasibilidad, la fuerza de voluntad, la perseverancia, el coraje y la energía personal. El Capitán Juan J. Comas afirmaba que Napoleón Bonaparte sostenía [y Clausewitz repetía] "...que los factores morales con relación a los materiales están en la proporción de tres a uno, no basta con tener un buen material intachable si se quiere, es necesario que el soldado sea más que una masa material, hay que educarlo. Hay que inculcar en él la idea que al enemigo se debe vencerlo a toda costa y que lograrlo depende de quererlo, para convertir un hombre rudo en soldado tiene que exaltarse los nobles sentimientos [democráticos]"<sup>9831</sup>.

Anticipándose a los modernos tratados sobre liderazgo o conducción (Janowitz, 1964; Hersey y Blanchard, 1982; Jiménez Jiménez, 1987; y Lorenzo Ponce de León, 2003), la impasibilidad era, para el Capitán Comas, condición necesaria para todo aquel líder militar que mande o conduzca, pues "...hasta en su rostro se reflejan las buenas y malas impresiones y estas últimas no deben trascender a la tropa, tampoco es necesario encontrarse en los puestos de más peligro por mostrar su valor, pues no necesita acreditarse en esta forma puesto que para llegar a ser jefe habrá dado en varias ocasiones la medida de lo que vale"<sup>9832</sup>.

En las primeras fases del combate, un líder debe mantenerse "...en apariencia tranquilo e impasible, corrigiendo sin reprimir y sin inmiscuirse en los detalles de la ejecución, al fin debe obrar con más actividad empleando todas las fuerzas para conseguir la victoria y si las necesidades lo exigen se pone al frente de las tropas; no debe tampoco adoptar el dilema de vencer o morir sino lo que crea más provechoso ejecutar en provecho de la patria cuyo honor es el que se defiende"<sup>9833</sup>. Culmina el Mayor Comas sosteniendo que las tropas pueden compararse "...a un proyectil cuya fuerza impulsiva en vez de ser la pólvora es el jefe que las lanza a la pelea, cuanto más hábil y más templado sea más probabilidad tendrá de alcanzar el éxito"<sup>9834</sup>.

## **I-V.- El honor militar como discriminatorio del honor civil**

En la polémica sobre el espacio de la disciplina militar en la legislación represiva, tiene lugar la introducción del tema del honor y del duelo, como resabio de la sociedad patriarcal y estamental del Antiguo Régimen colonial habsburgo, donde el honor era el privilegio de una capa señorial y/o de un linaje clánico o familiar.<sup>9835</sup> Cuando se hubo internalizado en las filas de los oficiales la conciencia del honor militar comenzaron a proliferar los lances caballerescos, la diferenciación del honor militar y la supervisión del honor civil por parte de los militares, manifestados expresamente en los padrinzgos militares ejercidos en los duelos o lances caballerescos entre civiles.<sup>9836</sup> Este honor se extendía a guardar silencio en las conjuras revolucionarias a las que podían haber sido invitados a participar. La defensa del honor del personal activo ante los denominados tribunales de honor estaba contemplada como un deber en los códigos de justicia militar.<sup>9837</sup> Esta prescripción se extendió también al personal pasivo y retirado como un

mecanismo de condicionamiento en las postrimerías del régimen desplazado por la puesta en práctica de la Ley Sáenz Peña.<sup>9838</sup>

A semejanza de otras profesiones, la altura del espíritu moral alcanzado era considerada un elemento clave en la formación militar.<sup>9839</sup> Cuando se trata de la educación y preparación del soldado para el combate, los Comandantes de Compañía deben, a juicio del Mayor Manuel Manrique, "... fijar la atención y como misión inherente a nuestro deber, levantar el espíritu moral, etc. de nuestros subalternos, que su comportamiento en todas partes sea correcto, respetuoso, y mucho mas con sus enemigos y prisioneros, sin que por esto se descuide la instrucción mecánica de nuestros reglamentos"<sup>9840</sup>

Los Comandantes de Compañía debían en consecuencia, "... arraigar en el ánimo de todos sus subalternos, el acendrado sentimiento del honor que exige el uniforme, desarrollando en ellos, las ideas de dignidad y honestidad para fortalecer su corazón y aprovechar toda oportunidad educadora, particularmente con el ejemplo de sí mismo".<sup>9841</sup> La educación militar no deja de ser entonces un problema complejo, y por ello es conveniente disponer la instrucción del modo más adecuado con su objetivo, eligiendo métodos "...que aseguren buenos y sólidos resultados prácticos en el menor tiempo posible".<sup>9842</sup> Lo primero exige para Manrique "...un plan racional dispuesto al cual se subordine toda la instrucción so pena de haber omitido algo o de consagrar algunas de las ramas que no concuerden con la importancia relativa de cada uno: y que el Comandante de Compañía, se dé exacta cuenta de la parte que es de su incumbencia personal y de la que corresponde a sus subalternos, dejando a cada uno, en lo que los Reglamentos, la disciplina y el orden lo permitan, su parte de iniciativa en la tarea particular y general de la compañía".<sup>9843</sup>

El ejemplo que penetra por la vista era para Manrique preferible a la explicación verbal. En todos los momentos en que fuere posible, se debía aprovechar "...la primera coyuntura favorable que le permita presentar un ejemplo o un caso práctico aunque sea por analogía, para el mejor esclarecimiento de lo que se desea enseñar".<sup>9844</sup> Otra de las condiciones que deberá tener presente el superior, es que en el Ejército argentino por regla general, "...se dirigirá a gente sencilla, a quienes es necesario dar la enseñanza oral, teniendo en cuenta su alcance intelectual no exponiendo muchas ideas a la vez y exigiéndoles que las repitan enseguida, para que ellas queden grabadas en su espíritu, evitando toda frase técnica, será conciso en cuanto sea posible, evitando el tono de conferencia, y por último, hará primar siempre el deber, el respeto al superior y a los reglamentos todos, dándoles estricto cumplimiento".<sup>9845</sup>

Para conseguir el buen resultado en la tarea emprendida, "...hay que unir a la exigencia, la perseverancia y la energía".<sup>9846</sup> Pero hay, según Manrique, superiores que confunden la energía "...con la cólera y aún con la irascibilidad personal; lo que no deja de ser un indisculpable error".<sup>9847</sup> Las exigencias del servicio, para Manrique, "...nada tienen que ganar con ello, a sus inclinaciones, dejando a sus subordinados azorados, y con el cuidado de no contrariar su fantasía; lo que redundaría en perjuicio de la disciplina y de los deberes del servicio en general. No es procedente irritarse y exasperarse y mucho menos hasta llegar a las vías de hecho, hay que rechazar este procedimiento inadecuado en todo su límite. El mal trato de palabras; toda exigencia mal entendida, causa terror a los débiles, exaspera y destempera la conciencia de los fuertes, en quienes una disciplina rígida en demasía y sobre todo injusta transforma sus aflicciones en odio y mala voluntad contra el superior, asechando el momento de la represalia".<sup>9848</sup> Sin embargo,

para Manrique "...basta con que recordemos lo que nuestro Código de Justicia Militar [CJM] predispone en sus artículos 820 y 823 como mejor argumento. Un hombre humillado [deshonrado] y despreciado por su superior, pierde la noción del respeto y aun el amor a su profesión doblegando así sus energías, para someterse al servilismo."<sup>9849</sup>

#### **I-VI.- El espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador.**

A pesar de que se contaba con el precedente de numerosos científicos prusianos presentes en la Campaña del Desierto y en la fundación de la Universidad de La Plata, la instalación de la Escuela Superior de Guerra, también con profesores alemanes, provocó un sordo rechazo entre un sector numeroso de la oficialidad del ejército.<sup>9850</sup>

Este rechazo se manifestó en forma indirecta, cuando un numeroso grupo de jefes y oficiales, heridos en su espíritu de cuerpo, atacó la nota que el periódico ***El Diario*** publicó cuando se inauguró dicha institución en el año 1902.<sup>9851</sup> No pudiendo sublevarse contra la creación de la Escuela, que era la mejor contribución del ministro General Luis M. Campos, "...se alzan contra ***El Diario***, que la ha aplaudido y asumen para el caso, representación que no tienen, fingiéndose víctimas de injurias que no han existido".<sup>9852</sup> Pero esta misma protesta, "...que es un acto grave de indisciplina, revela que aquel instituto era indispensable en el país".<sup>9853</sup> Con estar acusado ***El Diario*** de "...manía agresiva hacia los militares, nunca, a pesar de lo que sabemos y hemos dicho, hubiera abierto sus columnas al anuncio de un acto como este [la protesta militar] que, encubriendo el verdadero móvil, es un alzamiento, contra derechos constitucionales que ni el mismo Presidente de la República sería capaz de restringir".<sup>9854</sup>

Para ***El Diario***, los militares "...se han considerado a sí mismos, indiscutibles e insuperables, representantes de una raza privilegiada, mucho más hombres que el resto de los mortales, a quienes asignaban el papel de pasivos contribuyentes y les imponían el tributo y la obediencia. Como reflejo de un estado de organización y de disciplina militar, la protesta es de una elocuencia desastrosa. Dice más ese acto que todas las propagandas sistemáticas y enconadas".<sup>9855</sup> Los militares se jactan según ***El Diario*** "...de ser la nación misma: pero en realidad con arreglo, a la ley y a la lógica, no son sino empleados públicos, como los maestros de escuela o los profesores de la nación, pero no menos discutibles en las aptitudes y servicios costeados por el país. Si la Administración de Rentas, la Aduana, la dirección de Correos, etc. etc. están sometidos al control periodístico y se discute con toda amplitud sus defectos de organización, o las deficiencias del servicio, no vemos porque el ejército ha de sustraerse a estas mismas formas de discusión, cuando en el organismo institucional no es mas ni es menos que cualquiera otra rueda importante de la máquina".<sup>9856</sup>

En cuanto al alegado sacrificio del militar profesional, éste está representado "...por las exenciones y favores de que no gozan los otros defensores de la bandera. A estos profesionales la nación los toma por su cuenta casi desde la cuna. Les paga la escuela, les da ropa, casa, comida, libros y sueldo, y juntamente con el primer ascenso, les entrega un diploma que es la garantía de que seguirán percibiendo el pago de sus servicios".<sup>9857</sup> Cada nuevo ascenso de un oficial "...representa un doble sacrificio para la Nación, puesto que da al mismo tiempo, mayor suma de conocimientos y mayor sueldo. Mueren, y aunque mueren lejos del campo de batalla, el Estado continúa haciendo sacrificios, porque pasa a mantener a los deudos del extinto. En muchos casos

esta protección es más amplia, pues el alumno militar pasa de esta escuela, con una buena renta, a institutos europeos, viviendo y viajando durante años, por cuenta del Estado”.<sup>9858</sup>

Desgraciadamente, para *El Diario*, la nación no se ve beneficiada ni siquiera en materia intelectual, pues “...vemos que después de 20 años de estar funcionando la Escuela Militar [Colegio Militar de la Nación], y de remitir pensionados a Europa, aún es necesario importar profesores extranjeros para la Escuela de Guerra, sin que los progresos de la clase militar puedan sufrir paralelos con los de otros gremios nacionales, no obstante el excesivo proteccionismo fiscal. Tenemos médicos, abogados, y hasta músicos que honran la ciencia y el arte. En cambio, ¿Cuáles son las eminencias militares?”.<sup>9859</sup>

Sin embargo, pese a las buenas intenciones de *El Diario* el proceso de germanización o prusianización del ejército --que alcanzó su máxima expresión con la fundación de la Escuela Superior de Guerra-- tuvo efectos deletéreos para la institución, pues contribuyó a tender una creciente corporativización o autonomía relativa de las Fuerzas Armadas.<sup>9860</sup> Esta corporativización se acentuó, si tenemos en cuenta que los militares formaron sus propios clubes, y a diferencia de la socialización en las capitales de provincia no alcanzaron a mezclarse con los clubes de la elite porteña.<sup>9861</sup>

La germanización se evidenciaba fundamentalmente en la naturaleza de la instrucción desplegada. En el sentido alegado por Arbó y Blanco, el Capitán Carlos Funes (21-124-I) nos informa que en Alemania la oficialidad “...es un factor poderoso de dicha disciplina por el carácter y espíritu eminentemente militar que la distingue y que constituye por así decir una tradición perfectamente conservada. La tropa que ve a sus oficiales obedientes, puntuales en el cumplimiento del deber, marchar siempre en primera fila y soportar con entereza las fatigas que el servicio le impone, no puede menos que sentirse arrastrada hacia tales virtudes, y el soldado aquí se forma mas que todo por ese buen ejemplo que jamás le falta y que hizo decir a Rüchef: El espíritu del Ejército Alemán reside en sus oficiales”.<sup>9862</sup>

## I-VII.- Conclusiones

El despliegue del liderazgo y las virtudes morales que lo acompañaban, así como el ámbito de la disciplina han sido dimensiones cuyo espacio ha fluctuado históricamente a remolque de las doctrinas militares, en una suerte de sístole y diástole o expansión y contracción permanentes, gobernadas a su vez por las teorías hegemónicas vigentes en la esfera política.

Cuanto más intenso el autoritarismo implícito en las teorías políticas mayor era el rigor de la disciplina militar implantada y de la intensidad del orden pretoriano, y menor la capacidad de crítica y debate. Por el contrario, cuanto más alto el grado de democratización de las teorías políticas prevalecientes menor era la severidad de la disciplina, y más factibles la producción de un clima de debate y deliberación y de actos de rebelión y desobediencia a los mandos superiores.

## Capítulo IV-C-10-- Orden pretoriano y escarmiento anti-sedicioso

### Índice del Capítulo IV-C-10

#### J.- Orden Pretoriano y Escarmiento Anti-sedicioso

##### J-I.- Conato sedicioso en Formosa (1891)

###### J-I-a.- Antesalas del conato

###### J-I-b.- Pesquisa e interrogatorios policiales

###### J-I-c.- Consejo verbal de Guerra

##### J-II.-Liderazgo Sedicioso

###### J-II-a.- Características personales.

###### J-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados.

##### J-III.- Confesión *in Articulo Mortis*.

##### J-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra

###### J-IV-a.- Autocensura y escamoteo de la opinión pública

###### J-IV-b.- Derivaciones psicológicas

##### J-V.- Debido Proceso

###### J-V-a.- Omisión del derecho de defensa

###### J-V-b.- Justicia penal militar

##### J-VI.- Causales de la asonada

###### J-VI-a.- Causales políticas

###### J-VI-b.- Indisciplina castrense como causal

###### J-VI-c.- Venganza como causal.

##### J-VII.- Ejecución sumaria como escarmiento.

##### J-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones.

### Palabras Claves

Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública--causales políticas--comité revolucionario de soldados--conato sedicioso--confesión *in Articulo Mortis*--Consejo Verbal de Guerra--debido proceso--derivaciones psicológicas--ejecución sumaria--escarmiento anti-sedicioso--indisciplina castrense--justicia penal militar--liderazgo sedicioso--omisión del derecho de defensa—orden pretoriano--pena de Muerte--pesquisa e interrogatorios policiales--secuelas del Consejo de Guerra-

### Keywords

Death penalty--Self-censorship-public opinion--war council--due process--military indiscipline--insurgent leadership--Firing squad—praetorian order.

## J.- Orden Pretoriano y Escarmiento Anti-sedicioso

Habiendo estudiado las estrategias y tácticas contra-insurgentes o reactualizaciones de la cuestión del orden pretoriano, propias del estado burocrático-oligárquico (1880-1916), cabe ahora investigar aquellos casos de escarmiento anti-sedicioso, que por lo paradigmáticos y vaticinadores de eventos posteriores merece un tratamiento especial. La historia de los conatos sediciosos y de las represalias sangrientas que ellos

ocasionaban son acreedores --por su relevancia microhistórica y los escasos testimonios escritos que han quedado-- de toda una investigación pormenorizada.

Una vez producido en una unidad militar de frontera un conato sedicioso, se iban trabando en forma inmediata intensas transacciones y negociaciones con instancias de poder interno, tales como la Guardia de Prevención y la Mayoría del Regimiento, la Fiscalía Militar y el juzgado de instrucción, el Consejo verbal de guerra, y la Comandancia militar.

Para su estudio dividiremos el décimo capítulo en ocho apartados comenzando con las particularidades del conato sedicioso ocurrido en el Chaco Central (Formosa); continuando con la singularidad del liderazgo sedicioso; la confesión in articulo mortis del autor del mismo; y las secuelas psicológicas y comunicacionales producidas por la actuación del Consejo de Guerra; para luego emprender el estudio de las circunstancias del debido proceso; el análisis de las causales político-militares de la asonada; así como el tratamiento de la ejecución sumaria como dispositivo de escarmiento; y finalmente, estudiar las derivaciones personales y arribar así a las conclusiones del caso.

## **J-I.- Conato Sedicioso en Formosa (1891)**

### **J-I-A.- ANTESALAS DEL CONATO**

En el resto del país las réplicas de la Revolución del 90 persistían. En Saladas (Corrientes), se produce una represión de opositores y se genera lo que se conoce como **La Masacre de Saladas** (mueren Manuel Acuña, Castor Rodríguez, y Pedro S. Galarza).<sup>9863</sup> En el Rosario, en oportunidad de las elecciones convocadas en 1891, la custodia militar de los comicios produjo cruentos sucesos. Todo esto lejos de amedrentar a la tropa, "...la exasperan inoculando en ella el espíritu de resistencia y la sed de venganza".<sup>9864</sup> Y en el Territorio Nacional de Formosa --al decir de Oszlak (2004) una suerte de estado intermedio-- asiento de una economía de enclave y de un capitalismo depredador, compuesto de obrajes madereros y punta de rieles, tenían su sede en una extensa línea de fortines diversos regimientos de caballería, que servían a esta sociedad de frontera de garantía contra los malones aborígenes. Esta frontera era considerada, por su inclemencia climática y las enfermedades que provocaba (paludismo), como un destino de castigo.<sup>9865</sup>

En este contexto socio-económico y socio-cultural se produce un hecho que hasta hoy ha sido llamativamente ocultado por la prensa y por la historiografía respectiva. En efecto, a fines de septiembre de 1891, en el Regimiento 1º de Artillería, acampado en Formosa, se generó entre la tropa un conato de sedición, que sin alcanzar a consumar una rebelión fue duramente reprimido.<sup>9866</sup> Este Regimiento había sufrido --por su participación en la Revolución del Parque-- su disolución por Orden General del 14 de agosto de 1890, y sendos traslados desde Buenos Aires, primero a Resistencia (Chaco Austral), donde estuvo bajo la jurisdicción del General Antonio Dónovan; y luego a Formosa (Chaco Central) bajo la autoridad del General Napoleón Urriburu.<sup>9867</sup>

Dicho Regimiento había sido el que mas se había prodigado a los inicios de la Revolución del Parque (Buenos Aires), pues llegó a contar con cuatro piezas de artillería de marca Krupp, y su lucha de cuatro largos días se libró específicamente en el

cantón o barricada de la esquina de Viamonte y Talcahuano.<sup>9868</sup> A partir de este estado de intensa crisis, por decreto del 12 de agosto de 1891 y sobre la base del Batallón de Zapadores y Pontoneros establecido en el Chaco Central (Formosa), el Ministro de Guerra General Nicolás Levalle recreó el disuelto y castigado Regimiento 1º de Artillería.<sup>9869</sup>

Los regimientos de artillería debían tener tres escuadrones, y cada uno de ellos tres baterías. Cada batería, que es la unidad táctica por excelencia, debía a su vez contar con tres oficiales y más de un centenar de soldados.<sup>9870</sup> Asimismo, cada regimiento debía contar con su Guardia de Prevención y cada batería o compañía con su detall.<sup>9871</sup> La Guardia de Prevención debía llevar cuatro libros, el de novedades y castigos, el de correspondencia, el de existencias, y el de recorridos del oficial de servicio o semana.<sup>9872</sup>

Sus jefes, que eran oficiales superiores, tanto el de la guarnición Napoleón Uriburu como el del regimiento de artillería Julio Ruiz Moreno --que frisaban en los cuarenta años largos-- otrora unidos contra el Paraguay y la Rebelión de López Jordán en Entre Ríos, estaban políticamente enfrentados desde la revolución de 1874, pues Uriburu había tomado partido por Mitre en la batalla de La Verde; y Ruiz Moreno había cerrado filas con Roca, en la batalla de Santa Rosa contra el mitrista General Arredondo. Pero en esta nueva coyuntura, no los unía el amor sino el espanto a un enemigo común, la naciente Unión Cívica Radical. Esta era la cruda realidad que padecían los cuerpos de oficiales de la mayoría de los regimientos del país, que habiendo sido afectados por las fisuras políticas del pasado, ya fuere la rebelión de Mitre en 1874 o la de Tejedor en el 80, ahora se veían forzados a cerrar filas contra la amenaza de la insurrección. De ahora en más, una nueva y honda fisura se había abierto en el seno de la oficialidad, y esta era la Revolución del 90 y sus persistentes secuelas producidas en 1891, 1892, 1893, 1904 y 1905.

El jefe del regimiento, Coronel Julio Ruiz Moreno, no se destacaba por la rigidez disciplinaria, y se había ausentado en comisión a Buenos Aires a mediados de septiembre de 1891.<sup>9873</sup> Su viaje destinado a procurar pertrechos para la nueva unidad lo realizó conjuntamente con su soldado asistente Francisco Toranzo y el Jefe de Escuadrón Capitán José M. Abogadro (12-46-A), quedando al mando de la misma su segundo Jefe el Tte. Cnel. Federico López (5-5-A). Este último oficial --que en oportunidad de los sucesos de Julio del 90, estando de licencia en Córdoba, contribuyó a la represión organizando la Guardia Nacional, tarea para la cual había sido comisionado por el Gobernador José E. Garzón-- se caracterizaba, a juzgar por las referencias que dio su hermano mayor al solicitarle una beca en el Colegio Militar, por ser alto, ágil y fornido; y por las constancias registradas en el Libro de Ordenes del Colegio Militar se destacaba por haber ejercido como Cabo 1º abuso de autoridad que llegó a provocar "...resistencias y actos de insubordinación".<sup>9874</sup> Por ser egresado del Colegio Militar en 1878, y haber oficiado como profesor en 1886, López no podía ignorar lo que venía sucediendo en dicho Colegio desde la década del 70, y por ese motivo desconfiaba del nuevo cuerpo de oficiales subalternos.<sup>9875</sup> López se caracterizaba por el celo que ponía en sus funciones y por el rigor y la disciplina que pretendía imponer en una tropa y una oficialidad subalterna convulsionada por los violentos y sangrientos hechos que les había tocado vivir en Buenos Aires.<sup>9876</sup>

En esa difícil tarea de imponer rígidos códigos disciplinarios, López descubrió en una de las baterías del escuadrón bajo el mando del Cap. Abogado un conato sedicioso, o lo que despectivamente se conocía como la antesala de una chirinada.<sup>9877</sup> Este hallazgo comenzó la noche del 24 de septiembre, cuando el soldado Roque Roldán puso en conocimiento de dicho Jefe que el soldado Julián Bargas (asistente del Cap. Abogado) lo había invitado a participar en la sublevación del Regimiento "...diciendo que ya habían muchos comprometidos y que lo ponía en su conocimiento afin de que lo evitara".<sup>9878</sup> Entre los suboficiales y soldados conjurados en el supuesto comité revolucionario de soldados y clases he podido detectar en estas actuaciones al menos a ocho (8) de ellos, que pertenecían a la primera y segunda compañía del mismo escuadrón y eran el ex cabo Felipe Miranda, y los soldados enganchados o voluntarios Julián Bargas, Francisco Toranzo, Ramón Plaza, Roque Roldán, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, todos los cuales habrían también participado el año anterior, en Buenos Aires, en el mencionado cantón de Viamonte y Talcahuano, bajo el mando del Capitán Manuel Roldán, muerto en la metralla; y probablemente habrían tenido el privilegio de escuchar las arengas de Leandro Alem.

Por el contrario, entre el cuerpo de oficiales jefes, el Capitán Abogado se destacaba por haber participado activamente en la represión de los sublevados en el Parque de Artillería (1890), al extremo que el entonces Teniente Félix Adalid le escribe el 29 de julio de 1890 al Jefe de los Cantones oficialistas del cruce de Cerrito y Tucumán, Coronel Juan G. Díaz, recomendando al entonces Teniente del Batallón de Ingenieros José M. Abogado y al Cap. Juan F. Genoud, porque "...han coadyuvado eficazmente al buen éxito obtenido".<sup>9879</sup> Su descollante actuación represiva le valió el ascenso a Capitán.<sup>9880</sup> Pero la salud no era su fuerte, pues para 1894 se le manifestó la sífilis.<sup>9881</sup> También el Alférez José M. Muñoz, integrante del Consejo de Guerra verbal, al pedir clemencia en 1897 por un castigo que venía padeciendo, recuerda que su persona había sido "...de los primeros en presentarse a la Plaza de la Libertad donde se hallaban las fuerzas leales mandadas por el Gral. Levalle".<sup>9882</sup>

### **J-I-B.- PESQUISA E INTERROGATORIOS POLICIALES**

Desentrañar la madeja de un supuesto comité revolucionario no era algo sencillo para un oficial del arma de artillería, sin experiencia en inteligencia militar, pues los códigos conspirativos más elementales dictaban que sus miembros no debían nunca mostrarse juntos, y que tampoco debían todos conocerse entre sí.

Con el fin de averiguar lo que había de cierto en la delatoria denuncia producida el 24 de septiembre por un soldado llamado Roque Roldán, el Tte. Cnel. Federico López citó al soldado Julián Bargas para formularle una serie de preguntas, pero dieron resultados infructuosos.<sup>9883</sup> Como López se apercibió que el citado Bargas "...lo había visto conversando en la puerta de calle con el soldado Roldán", concibió una original estratagema ordenando que el referido Roldán "...pasara preso a la Guardia y que en el **Libro de Presos** se le pusiera la nota de 'por delator'".<sup>9884</sup> Esta estratagema la adoptó "...a fin de que el soldado Bargas creyera que [él] no había hecho caso de la denuncia pudiendo así seguirles la pista y tomar infraganti delito a los presuntos sediciosos".<sup>9885</sup> Desde el mismo día que López tuvo noticias de este conato de sublevación se puso en campaña "...a fin de constatar de una manera positiva quienes eran los autores y cuales sus cómplices, tomando al mismo tiempo toda clase de medidas y con todo sigilo afin de reprimir el movimiento sedicioso si repentinamente estallaba".<sup>9886</sup>

Cuatro días después, a la media noche del 28 de septiembre, en el mayor de los sigilos y sin el concurso del cuerpo de jóvenes oficiales subalternos (del cual su Jefe desconfiaba por haberlos conocido en su breve transcurso como profesor del Colegio Militar en 1886), el Tte. Cnel. López se presentó a recorrer el cuartel, y al entrar en él "...recibió parte del Sargento Primero distinguido Arditto Machiavello (egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos), que desempeñaba las funciones de Oficial de Guardia (por hallarse preso todos los oficiales del cuerpo)".<sup>9887</sup> Momentos antes, el soldado Francisco Toranzo, que se había reincorporado al Regimiento a su propio pedido (luego de haber estado el mes anterior en Buenos Aires de asistente del Jefe del Regimiento Ruiz Moreno), había invitado al Sargento Carabajal, que se hallaba de servicio en la Guardia de Prevención, a sublevarla "...manifestándole al mismo tiempo que había muchos soldados comprometidos".<sup>9888</sup>

De resultas de ello, el Sargento Machiavello detuvo al referido Toranzo y lo puso en el calabozo incomunicado. Más luego, al obligarlo a comparecer ante el Tte. Cnel. López e interrogarlo --vaya a saber con qué métodos-- confesó "...su plan de sublevar el Regimiento esa noche dándole al mismo tiempo los nombres de los cabecillas, que lo eran el ex cabo Felipe Miranda, el soldado Ramón Plaza y José Collanti siendo el más comprometido el soldado Julián Bargas".<sup>9889</sup> Es preciso tener en consideración que estos soldados no eran conscriptos sino veteranos, enganchados o voluntarios, siendo muchos de ellos rescatados de las cárceles de provincia, de su condición de condenados o procesados por delitos comunes.<sup>9890</sup> Para Bloch (2003), los que aparentan más bravura suelen ser los que menos resisten la derrota, y Toranzo parecía honrar dicho adagio.<sup>9891</sup> Acto continuo López se fue a la segunda compañía a la que pertenecían los tres primeros cabecillas "...haciéndolos levantar de sus camas y sacándolos sólo fuera del cuartel les intimó revólver en mano le dijeran la verdad, a lo que no se rehusaron manifestando su complicidad en el conato de sedición y confesando que los autores principales eran los soldados Francisco Toranzo y Julián Bargas".<sup>9892</sup>

En vista de la confesión de Toranzo, López ordenó al Sargento Machiavello "...formara la Guardia y la condujera al paraje donde él se encontraba con los cuatro presuntos sediciosos (Plaza, Collanti, Moreira, Ledesma)".<sup>9893</sup> El documento no nos revela de que paraje se trata, pero debemos presumir se refiere a la sede de la segunda compañía. Ante la presencia de la Guardia, el Tte. Cnel. López "...se puso al frente de ella y al arengarla [con fuerte voz de mando] respondieron con un viva de adhesión".<sup>9894</sup> En seguida López procedió a efectuar una razzia o redada en la oscuridad nocturna arrestando a todos los complicados identificados, y a asegurar así "...la tranquilidad en el interior del cuartel colocando en cada cuadra dos [sargentos] distinguidos de centinelas con la orden expresa de defender su puesto a sangre y fuego".<sup>9895</sup>

#### **J-I-c.- Consejo Verbal de Guerra.**

Asegurada así la quietud de la unidad militar, el Tte. Cnel. López requirió entonces la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición y Gobernador del Territorio Nacional de Formosa, General de Brigada Napoleón Uriburu, "...a fin de que tomara la intervención que para estos casos prescriben las ordenanzas [de Carlos III]".<sup>9896</sup> "Tomar intervención" significaba que López derivaba hacia arriba la responsabilidad del trámite que se habría de seguir. Debe tenerse en cuenta que en ese tiempo regía en materia militar sólo la Ley de Ascensos (1882).<sup>9897</sup> Si bien aún no estaba en vigencia ni la Ley

3190 de 1894 (redactada por los Tenientes Coroneles Ricardo Day y Augusto Maligne), ni el Código Bustillo (antecedente inmediato del Código de Justicia Militar), y aún prevalecían las Ordenanzas de Carlos III, desde 1852 y siempre y cuando no estuviere en vigencia la Ley Marcial, regía en todo el territorio, incluidos los denominados Territorios Nacionales, las garantías especificadas en la Constitución Nacional.<sup>9898</sup>

A continuación Uriburu se presentó de improviso en el Cuartel. Este General fue cuando joven, según lo describe Paul Groussac, de “exterioridad fanfarronesca”, aunque había sido Guerrero del Paraguay, Expedicionario del Desierto, Jefe de la Frontera de Salta, y Revolucionario en Julio del 90. Por su participación en esta última conflagración cívico-militar, debido a su filiación Mitrista, fue dado de baja; y más luego amnistiado, reincorporado y destinado a Formosa a mediados de abril de 1891.<sup>9899</sup> Uriburu había encabezado sendas expediciones exploradoras en 1870 y 1872, y había residido en este asiento de frontera, en la primera mitad de la década del 70, como Secretario del Cap. Luis Fontana y luego como Gobernador. A renglón seguido, y recordando que para septiembre ya se había firmado el Acuerdo Roca-Mitre, Uriburu --que competía en la región chaqueña con el General Antonio Dónovan a quien le fue ordenado intervenir en Corrientes con motivo de la sublevación del Batallón provincial en Julio de 1891-- asumió “...una actitud verdaderamente enérgica”, y con la fe propia de un converso imprimió al trámite la condición de juicio sumarísimo y dispuso --de acuerdo con las leyes militares-- la “...celebración de un Consejo de Guerra verbal”.<sup>9900</sup>

Este particular Consejo de Guerra, a diferencia de los Consejos de Guerra ordinarios y permanentes, era un Consejo especial o de Comando y por tanto extraordinario y ad hoc, sin actas ni testimonios escritos, de una duración máxima de 24 o 48 horas, y se formaba luego de que existía una denuncia oficial o por órdenes de los jefes de las Fuerzas Armadas, para juzgar a los uniformados sindicados de haber cometido traición a la patria, conspiración, sedición o rebelión.

Dicho Consejo de Guerra se constituyó en la Mayoría del Regimiento con la presidencia del oficial jefe Tte. Cnel. Federico López (5-5-A), de 36 años de edad, y se sortearon como Vocales --para que entendieran y fallaran en la causa-- a los oficiales subalternos del cuerpo (que actuaron del lado leal en los sucesos de Julio de 1890), todos más de diez años menores que él: el porteño José M. Muñoz; el tucumano Elías Paz (12-31-A), de 24 años; el correntino Antonio Tassi (16-37-I), de 22 años; el entrerriano Neriz F. Redruello (16-51-A), de 23 años; y el cordobés Demetrio Márquez (16-43-I), de 26 años; y el más joven de todos ellos Alberto Perón (16-45-A), de 20 años, quién extrañamente fallece en 1896 en Villa Nueva (actual Villa María) cuando sólo contaba con 25 años de edad.<sup>9901</sup> Todos estos oficiales tuvieron a su cargo el juzgamiento de tres de los soldados incriminados, el núcleo duro del comité revolucionario, compuesto por los soldados Bargas, Toranzo y Moreira. Salvo Muñoz, todos los otros miembros del Consejo eran egresados del Colegio Militar. De estos últimos, el Teniente 1º. Paz pertenecía a la Promoción 12ª, que egresó en 1886, y por tanto conocía las andanzas del Teniente César Cerri, perteneciente a la 10ª Promoción, o la conducta del Teniente Juan Comas, perteneciente a la 16ª Promoción. A esta última Promoción pertenecía el resto de la oficialidad del Regimiento, la cual egresó en 1900.<sup>9902</sup>

## **J-II.-Liderazgo Sedicioso**

### **J-II-a.- Características Personales del Liderazgo Sedicioso**

Extrañamente el sumario declara que Bargas se encontraba detenido fuera del cuartel en lo que vendría a ser una suerte de cárcel secreta. Esto probablemente ocurrió para evitar que estuviere en contacto con los otros soldados detenidos, por estar los calabozos comunicados entre sí. Se dispuso así, que una comisión especial fuera en busca del imputado como cabecilla, soldado Julián Bargas, "...la que lo trajo cerca de las doce meridiano".<sup>9903</sup> Bargas seguramente contaba con una personalidad inusual para su escaso rango militar, y habría estado dotado de un notorio carisma con el cual haber podido liderar una conspiración en un lugar tan recóndito y en condiciones tan adversas.

Al ser interrogado por el Tte. Cnel. Federico López, acerca de quién lo convenció de sublevar el cuerpo, Bargas contestó en presencia del Sargento primero distinguido Don Alberto Cáceres, también egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, que lo "...había hecho inducido por el Capitán Abogado", pero que más tarde "...al llamársele para que declarase negó esta aseveración".<sup>9904</sup> Pero al cabo de seis días de capilla (una experiencia por cierto más dura y fatal que las trincheras del Parque o del Paraguay) -- en estricta incomunicación y aislamiento-- un lapso suficiente para que se le borrara cualesquier rastro de golpiza, el tres de Octubre a mediodía, el primer testigo López declara que "...al ir al banquillo para ser fusilado", Bargas "...pidió permiso para hablar".<sup>9905</sup> Al serle concedido este último ruego, y dirigiéndose desde el patíbulo al Regimiento que se hallaba formado en cuadro, probablemente con los ojos vendados y con grillos en muñecas y pies, Bargas ratificó en voz alta que "...el capitán José M. Abogado era quien lo había inducido a sublevar el cuerpo".<sup>9906</sup> El tercer testigo, el Sargento Distinguido Eleodoro Quiroga, otro egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, declaró que apenas lo pudo escuchar, pues lo hizo susurrando y "...con voz entrecortada".<sup>9907</sup>

## **J-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados**

La Junta revolucionaria local se hallaba liderado por quienes se desempeñaban como soldados asistentes (Toranzo y Bargas), tanto del Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno como del Jefe del Escuadrón Capitán Abogado. Se elegía como asistentes por lo general a aquellos soldados más afines y de mayor confianza.

La condición de asistente, amén de tener que hacer los mandados a la esposa del oficial, debía cebar mate, oficiar de cochero y lustrar las botas de su Jefe lo cual le brindaba al nominado el privilegio de no hacer guardia, y no tener que estar subordinado a los jefes de compañía. Esto les permitía en el espacio intermedio entre el domicilio del oficial, el detall del escuadrón, la cantina del regimiento y la guardia de prevención operar como bisagras con el resto de los soldados y suboficiales conspiradores. En las bailantas y prostíbulos los días de franco, los soldados asistentes llevaban como primicia lo que los oficiales comentaban de sus lecturas en los periódicos.<sup>9908</sup> En ese sentido, ningún episodio público acontecido en el país o fuera de él habría pasado desapercibido. Ni el golpe de estado en Brasil de noviembre de 1889 que derrocó al Emperador Don Pedro II, ni el aniversario de la Revolución del 26 de Julio en Buenos Aires, ni el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda en la Legación Argentina en Santiago de Chile ocurrido el 18 de septiembre de 1891, ni la sublevaciones policiales y militares acontecidas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, y la muerte en este último lugar de sus jefes y oficiales, podían haber sido ajenas en las ruedas materas.

Pero cabe señalar, por lo que surge del postrer expediente, que el soldado Julián Bargas, cabecilla del comité revolucionario de soldados, no delató a ninguno de los otros soldados implicados en la conspiración, ni al Sargento Carabajal ni al ex Cabo Miranda implicados en el complot, ni tampoco al Alférez Muñoz, quien tenía en común con Bargas el haber sido al inicio de su carrera soldado distinguido, sino a un capitán del cual había sido asistente, que provenía del Colegio Militar, había actuado con las fuerzas represoras en la Revolución del Parque y que al momento del descubrimiento del conato sedicioso se hallaba ausente en Buenos Aires, el Cap. José M. Abogadro.<sup>9909</sup> Como en el interrogatorio el soldado Bargas calló, se ignora si existieron otros soldados conjurados que se hubieren librado de las delaciones de los soldados traidores, quebrados por los tormentos, Roldán, Toranzo y Moreira.

Seguramente, Bargas supo en esos desolados días que el proceso verbal (lectura del sumario, plenario, acusación y defensa) no deja testimonio escrito, y por eso apeló a una denuncia equívoca o falsa para lograr que en última instancia se abriera un sumario post-mortem. También habría pensado que denunciando en público sólo a un oficial, al existir entre ellos una atmósfera de sospecha se dividirían y se verían obligados a substanciar un sumario escrito, y que por tener que intervenir un fiscal y estar obligados a indagar testigos podría ganar tiempo y postergar sine die lo inevitable. En cuanto a la verosimilitud de la denuncia producida en artículo de muerte, el Tte. Cnel. López "...no la creyó cierta por tener la mejor opinión formada del referido Capitán y considerándole materialmente incapaz de entrar en consorcio con la tropa para llevar a cabo un acto sedicioso".<sup>9910</sup>

### **J-III.- Confesión *in Artículo Mortis***

De lo que surge de las actuaciones administrativas, el soldado Bargas había declarado ante la Asamblea de Jefes, oficiales y sargentos distinguidos y del Consejo de Guerra verbal, que se celebró en el Cuartel del Regimiento en la madrugada del día 29 de septiembre para oír y juzgar primero al soldado Francisco Toranzo, que "...no sabía nada de la sublevación".<sup>9911</sup> Pero cinco días antes, el 24 de septiembre, ya le había revelado al segundo jefe del cuerpo Federico López "...que había sido inducido a sublevarlo por el Capitán Abogadro".<sup>9912</sup> ¿Que paso en estos cinco días para que el soldado Bargas revirtiera sus declaraciones previas?

Sin embargo, la declaración hecha el 3 de octubre, momentos antes de ser ejecutado, la había oído el segundo testigo sargento distinguido Alberto Cáceres y es la misma declaración que hicieron ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, tanto el Tte. Cnel López como el Teniente Elías Paz, confesión que había repetido *in articulo mortis* "...delante de todo el Regimiento formado y que debe haber sido oída por todos los Señores oficiales, clases y soldados del mismo".<sup>9913</sup> También el cuarto testigo Alférez de la Primera Batería del Primer Escuadrón Neriz F. Redruello declaró ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre que lo confesado por el soldado Bargas, en artículo de muerte, fue mas o menos lo siguiente: "...que estándole sevando mate en el cuarto de Banderas, a dicho Capitán [Abogadro], éste lo había visto para que invitara a los soldados de su compañía para el movimiento sedicioso que debió estallar en la noche del 28 del mes ppdo.".<sup>9914</sup> De cuanto le había manifestado, Abogadro le pidió "...guardara silencio hacia el General y Comandante, y que el declarante ignora haya manifestado lo contrario delante de nadie".<sup>9915</sup> El Gral. Uriburu concluía rápidamente, conocedor como pocos del arte de conspirar (se había sublevado en Salta contra el Gobernador Francisco J. Ortiz y en la

Revolución del Parque contra el Presidente Juárez Celman), que lo que muy probablemente “había de verdad en estas acusaciones”, es que una vez sorprendido en su conspiración, el soldado Bargas, preso del temor por lo que podría sobrevenir, había querido “...descargar una parte de su responsabilidad acusando a un superior”.<sup>9916</sup>

A pesar de estar suspendido, el Consejo de Guerra verbal que debía juzgar al tercer soldado José Moreira --desertor y complicado en el delito de sedición-- se había resuelto por unanimidad el 29 de septiembre llamar a su seno al Jefe de las fuerzas de la Guarnición con el objeto de oír su opinión, para lo cual se le había extendido la nota de estilo. Pocos momentos después del llamado, el General Napoleón Uriburu acudió al salón de la Mayoría, y luego de oír al Tte. Cnel. López y al Teniente 1º Paz “...resolvió que lo actuado por el Consejo le fuese elevado para su resolución suspendiendo así el Consejo”.<sup>9917</sup>

El proceso fue interrumpido adrede por razones que no quedan claras. Como se verá más luego en el juicio de instrucción substanciado con motivo de la acusación *in articulo mortis* que pesaba sobre el Capitán Abogadro, se daba en el cuartel --según lo expresado por el Teniente Tassi y el Tte Cnel. López-- una extrema familiaridad entre oficialidad y tropa, así como “...habrían criticado con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa”.<sup>9918</sup> Entre cuáles oficiales y cuáles soldados se daba dicha familiaridad y de que tipo de familiaridad y crítica violenta se trataba no es posible determinarlo. Sin embargo, se debe presumir que dicha acusación se refería esencialmente a las relaciones entre la oficialidad y una tropa enganchada y veterana, muy diferente a la tropa conscripta que se dio posteriormente; y específicamente se refería a la relación entre oficial y soldado asistente. Pero puede suponerse también, como lo sostuvo Bloch (2003), que cuando la superposición de autoridades es excesiva la responsabilidad se diluye.<sup>9919</sup> Dentro de ese tipo de relaciones podrían entrar tanto el Capitán Abogadro y su asistente Bargas, como el Coronel Ruiz Moreno y su asistente Toranzo.

Sin embargo, los tenientes, que debían ser jefes de compañía o batería, no tenían el privilegio de designar soldados asistentes. El Teniente Tassi era el menos sospechoso de todos ellos por haber sido el más crítico al extremo de ser luego cambiado de destino, conjuntamente con su compadre el Teniente Márquez. Redruello también había sido muy crítico pues manifestó creer que “...la causa que haya motivado el conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía”.<sup>9920</sup> En conclusión, por descarte, sólo queda pensar en el trío de los oficiales subalternos Muñoz, Paz y Perón, quienes permanecieron en el regimiento y aparentemente se hallaban enfrentados con el dúo formado por los tenientes Tassi y Márquez.

Lo cierto es que para reforzar el espíritu de cuerpo, evitar seguir hurgando en el conflicto y que se abriera una Caja de Pandora que le quemara las manos, pudiera comprometer el prestigio de la Guarnición y generar entonces un clima de deliberación, una corriente de simpatía hacia el procesado y una eventual rebelión de la tropa, semejantes a las ocurridas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes apenas unos meses atrás; el tres de Octubre, por decisión del Jefe de la guarnición General Uriburu, y sin más trámite procesal, se ejecutó al soldado Bargas con todo el ceremonial militar del caso. Se ignora si en dicho ajusticiamiento existió el derecho a ser asistido por un capellán castrense que le prestara los últimos auxilios (extremaunción), y si quedó registrada su acta de defunción en los libros de alguna

parroquia o cementerio. También se ignora si Uriburu comunicó su sentencia al Ministro de Guerra Levalle, y éste al Presidente Pellegrini, para que --como en el célebre caso del Cabo Paz acontecido en 1935 (Carreras, 1974)-- pudiera existir la oportunidad de un indulto.<sup>9921</sup>

Más luego, en el mismo día, el Tte. Cnel. Federico López presidió otro Consejo de Guerra verbal esta vez contra el soldado José Moreira "...que por declaraciones aparecía como uno de los cabecillas del conato de sublevación y que había desertado en la madrugada del día 29 de septiembre".<sup>9922</sup> Pero como al prestar su deposición el primer testigo soldado Lucio Ledesma apareciese con mayor grado de culpabilidad que el presunto reo José Moreira, el Tte. Cnel. López hizo presente esta situación a los Vocales del Consejo de Guerra que "...en vista de esta circunstancia se hacía necesario la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición a fin de que resolviese la dificultad del caso".<sup>9923</sup>

## **J-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra**

### **J-IV-a.- Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública**

El conato de sedición y el fusilamiento, cuya posible repercusión en Buenos Aires tanto lo tuvo preocupado al Comandante Federico López, según nos lo informa el Cap. Abogado, no alcanzó a trascender a la opinión pública del país.<sup>9924</sup> Ninguno de los grandes diarios de la época levantó la noticia, lo cual era concebible en el diario ***La Nación*** (propiedad del ex presidente Mitre), porqué en Junio de 1991 acababa de firmarse el Acuerdo Roca-Mitre, y ya no regía el estado de sitio.<sup>9925</sup> Pero por tratarse del drama de un simple soldado --en medio de una república aristocrática pero acusada de oligárquica-- tampoco ninguno de los otros diarios habría demostrado interés por levantar la noticia.<sup>9926</sup> Por cierto, muy otra hubiera sido la recepción del hecho de haberse tratado de un oficial, como fue al año siguiente el sonado caso de los oficiales de la Corbeta Rosales, hundida en el Río de la Plata con toda la marinería a bordo, y comandada por el Capitán Pedro Funes, sobrino político del ex Presidente Julio A. Roca.<sup>9927</sup>

Sin embargo, a pesar de tratarse de un mero soldado, es inconcebible que el Jefe de la Guarnición de Formosa Gral. Napoleón Uriburu no haya comunicado semejante novedad por vía telegráfica al Ministro de Guerra Gral. Levalle, ni que éste no se la haya elevado al Presidente de la República Dr. Carlos Pellegrini y no haya ordenado publicarla en el Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército. Si ese último fue el caso, y la cruel novedad fue eventualmente publicada en dicho Boletín --que si bien hoy los ejemplares de ese año son inhallables no pierdo la esperanza de encontrarlos-- no se comprende como la información no llegó a la redacción de los periódicos y por consiguiente a ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Por lo tanto, debemos concluir que el inclemente episodio no alcanzó a publicarse en dicho Boletín Oficial --o lo fue pero en un Boletín Reservado-- por cuanto no lo registran ni la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, ni los Asuntos Entrados y los Pedidos de Informes de ambas Cámaras del Congreso, ni el Senador Alem lo denunció en su discurso posterior al trágico hecho, ocurrido el 20 de octubre de 1891.<sup>9928</sup> Es decir, podemos deducir que la no publicación en el Boletín Oficial del Estado Mayor de un hecho de semejante tenor debe haber obedecido a un acto de

autocensura del propio Ministro de Guerra y Marina General Levalle, a los efectos de encubrir el acto de Uriburu, a quien por razones obvias no podía avalar públicamente ni tampoco destituir.

El impune escamoteo de dicha información al público y las instituciones permitiría conjeturar que esta pena capital en juicio sumarísimo, que debería caracterizarse como ejecución sumaria o extrajudicial, no fue la única dictada en ese trágico tiempo.<sup>9929</sup> Y la autocensura acordada por el Ministro de Guerra con el Presidente Carlos Pellegrini y el Ministro del Interior General Julio A. Roca habría obedecido a la decisiva influencia que estos últimos ejercían sobre el primero, seguramente por ser en el caso de Pellegrini hijo de “gringos”, es decir paisano de origen (Italia).<sup>9930</sup> La naturaleza lavada de dichos Boletines, que no informan sobre ningún tipo de castigos, permite a su vez conjeturar que estaban dirigidos a desinformar a la opinión pública. Cabe entonces argumentar que el cruento hecho político fue sepultado en un olvido premeditado, quedando mutilado ex profeso de la memoria colectiva por obra de las más altas esferas del gobierno nacional.

Sin embargo, a pesar de la autocensura oficial se hace difícil pensar que la noticia no haya podido filtrarse al menos entre los colonos de las chacras, los capataces y peones de los obrajes madereros del Chaco, y las meretrices y madamas de los prostíbulos, dado que la ejecución fue practicada frente al “Regimiento formado en cuadro”, lo cual significa casi un millar de testigos cuya identidad debe haber quedado registrada en las Listas de Revista de la época. Y pese a lo fracturado que estaba el Ejército y lo arrinconados que estaban los oficiales revolucionarios ¿no estaban dichos oficiales enterados de la existencia de juicios sumarísimos? Y si lo estaban ¿porque no atinaron a transmitirla a la conducción partidaria para que Alem la denunciara en su discurso senatorial del 20 de octubre de 1891? ¿Acaso, la condición de soldado, que detentó la víctima, le restaba relevancia política al episodio?

La pena de muerte y los tormentos eran entonces un ingrediente asiduo para repeler las deserciones o la cobardía y la traición en el campo de batalla pero no para reprimir friamente eventuales e hipotéticos motines o sediciones de naturaleza política. En la guerra al Indígena en el Desierto, el Comandante Manuel Prado, el Coronel José S. Daza y *La Vanguardia* nos revelan conmovedores fusilamientos por casos de deserción y el General Ignacio H. Fotheringham nos confiesa la existencia en los cuarteles de crueles tormentos.<sup>9931</sup> Cuando la Revolución del 90, también se propaló la existencia de fusilamientos en el campo de batalla, pero que en el caso del Cap. Eloy Brignardello, no se lograron corroborar.<sup>9932</sup> Pero, salvado este último caso, lo que hace de lo ocurrido en el Chaco Central (Formosa) extremadamente singular, es que hacía tiempo que no se aplicaba la pena capital por causas de orden político y fuera del campo de batalla. Probablemente, la impunidad de este caso se haya difundido entre los cuadros de oficiales, pues treinta años después, en 1921, el Coronel Héctor Varela repitió en ocasión de las huelgas rurales acontecidas en los Territorios Nacionales de la Patagonia procedimientos sumarísimos semejantes, lo cual fue holgadamente investigado y divulgado por José María Borrero y Osvaldo Bayer y hasta cinematográficamente representados.

#### **J-IV-b.- Derivaciones Psicológicas**

Lo cierto es también, que salvo el Capitán José M. Abogadro, cuyo legajo personal no fue ni expurgado ni desglosado, lo cual hablaría bien de él, los otros miembros del

Consejo de Guerra verbal fueron víctimas del síndrome del verdugo, pues a pesar de haberse contradicho y enfrentado mutuamente, como luego se observará, ocultaron sistemáticamente los hechos y guardaron un silencio mortal. Del ex cabo y de los soldados que lo denunciaron al soldado Bargas nada he podido averiguar hasta el momento. Y del propio Bargas, se desconoce su lugar de origen, quienes fueron sus padres, si tenía hermanos y/o prometida, si tenía estudios, y si ingresó al ejército como soldado raso, de leva enganchada o voluntaria, y en este último caso si era o no soldado distinguido.

En ese entonces, por regir aún las Ordenanzas de Carlos III, se daba el título de "don" a todos los oficiales y sargentos, y a los hijos de soldados, se les calificaba aptos para recibir el título de "distinguido" y para postular a la plaza de "Cadete".<sup>9933</sup> Para sentar plaza como "soldado distinguido", la cual era una institución propia del antiguo régimen colonial habsburgo y de su estructura estamental, era necesario entonces haber nacido en una familia "decente y conocida". Pero por su apellido y la indiferencia con que fue recepcionada su victimización podemos presumir que su familia no pertenecía al estamento "decente", y que por el contrario era un criollo, probablemente del interior, y como tal no era blanco ni rubio, sino trigueño, mestizo o mulato. Demás está decir que se ignora donde fue enterrado y cual fue su tumba, y que ninguna calle o plaza del país recuerda su nombre.

Las secuelas que produce el terrorismo de estado difieren según la edad, el lugar de origen, la adscripción política-religiosa, la extracción social, y la posición económica. Entre los miembros de las fuerzas armadas, estas secuelas deben variar acorde con la jerarquía militar y la responsabilidad alcanzada. Entre las expresiones del sufrimiento provocado por el trauma psicológico se dan el susto, la tristeza, la depresión, el duelo alterado, el mutismo, la desconfianza, la inhibición e indefensión, y las enfermedades somáticas y psicosomáticas (insomnio, palpitaciones, asma, hipertensión arterial, cefaleas, tortícolis, náuseas, dolores de cabeza y de estómago, etc.). También se dan otras expresiones del sufrimiento como las pesadillas, la apatía, el alcoholismo, el suicidio, y los sentimientos de cólera y soledad.<sup>9934</sup>

## **J-V.- Debido Proceso.**

### **J-V-a.- Omisión del Derecho de Defensa**

De las constancias escritas que se han podido rescatar, no se desprende que en el juicio sumarísimo del soldado Julián Bargas se haya cumplido con el debido proceso, pues aparentemente no hubo etapa de instrucción ni fue confrontado o careado con los soldados acusados que lo delataron (Roldán, Toranzo), ni con el Cap. Abogado imputado de instigador, en ese momento ausente en Buenos Aires.<sup>9935</sup> Tampoco se puede saber si tuvo acceso a un oficial auditor que hiciera de defensor, designado de oficio, que interpusiera un Habeas Corpus; y si en efecto se le dio la oportunidad de la defensa, como la tuvieron los criminales de la Mazorca (Cuitiño, Badía, Alem [padre], Troncoso, Parra, Santa Coloma) en tiempos del Estado de Buenos Aires (1857), defendidos por el célebre letrado y político Marcelino Ugarte; o como los oficiales de la hundida Corbeta Rosales (1892), defendidos por Enrique Victorica, hijo del Ministro de Guerra Benjamín Victorica.

Por no ser entonces provincias, en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa, La Pampa y Misiones y en los cinco Territorios de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén) --como en la Colonia Penitenciaria que describe Kafka, o la más moderna Base de Guantánamo (USA)-- no existían poderes judiciales independientes ni división de poder alguna, ni legislaturas o guardias provinciales que equilibraran el poder militar del Ejército, ni existían periodistas como José María Borrero (Santa Cruz en 1919) que pudieran formular observaciones críticas que comprometieran los actos de sus todopoderosos Comandantes de Guarnición.

Por otro lado, en esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar (1894) ni el Código Bustillo (1898), los juzgados militares se regían por el Compendio de Colón de Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta (1858).<sup>9936</sup> Pero si bien los miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la Constitución Nacional también estaban protegidos por un fuero especial. Ese fuero especial era el que emana del decreto real del 9 de febrero de 1793, que establecía el Fuero Militar o fuero de guerra en los ejércitos de España y ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales castrenses de los militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, es decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.<sup>9937</sup>

#### **J-V-b.- Justicia Penal Militar.**

Las actuaciones administrativas de rigor en la Justicia de Instrucción Militar se iniciaron cuatro días después de la ejecución del soldado Bargas, el 7 de octubre, al elevar el 2º Jefe del Regimiento Federico López al Jefe Coronel Ruiz Moreno un Parte de la situación donde le informaba de la denuncia producida *in articulo mortis* por el ajusticiado Bargas contra el Cap. José M. Abogadro.

Dado que el referido oficial Abogadro "...no ha dado paso alguno para vindicar su inocencia", López creía de su deber llevar la cuestión a su Jefe para que "...dicte las providencias convenientes".<sup>9938</sup> El mismo día, el Jefe del Regimiento Ruiz Moreno elevó el Parte correspondiente con copia a su vez del Parte del Tte. Cnel. López al Jefe de la Guarnición Gral. Uriburu. Y una semana más tarde, el Gral. Uriburu nombró como Fiscal para la averiguación de los cargos efectuados contra el Cap. Abogadro al Jefe del Detall Fiscal Mayor Carlos Carpi, encargado de la instrucción del sumario, y Carpi nombró como su Secretario al Jefe de la Primera Batería del Cuarto Escuadrón del mismo Regimiento, Alférez José Miguel Mujica.

Ante Carpi y Mujica declararon el acusado Cap. Abogadro, el Jefe de la Guarnición Uriburu y cinco testigos: el 2º Jefe Tte. Cnel. López, los Sargentos 1º Distinguidos Alberto Cáceres y Eleodoro Quiroga, el Alférez Neriz F. Redruello y el Teniente 1º Elías Paz. Extrañamente, ni Antonio Tassi, ni Demetrio Márquez ni José M. Muñoz, que integraron el Consejo de Guerra verbal, fueron citados como testigos. El primer testigo en declarar fue el Tte. Cnel. López, quien se ratificó del Parte que en su oportunidad elevara. A renglón seguido se produjo la indagatoria del acusado y arrestado Cap. José M. Abogadro, de 23 años de edad, quien negó todos los cargos por ser "completamente falsos" y manifestó que la acusación del soldado Bargas "...no hera mas que una impostura por salvarse del castigo".<sup>9939</sup>

#### **J-VI.- Causales de la Asonada**

## J-VI-a.- Causales Políticas

A fin de inquirir la verdad de los móviles que pudieron haber impulsado a los soldados a cometer el acto sedicioso del 28 de septiembre, y dado que el Teniente 1º Elías Paz había manifestado no recordar por haber estado en aquella ocasión con una cefalea (“malo de la cabeza”), y estando presentes en el Consejo de Guerra Verbal el Tte. Cnel. Federico López como presidente del cónclave, y a su derecha sentados en cónclave los vocales que en él actuaban, por estricto orden de antigüedad, previa la venia del Gral. Uriburu, López pidió “...al Consejo (compuesto de los oficiales del cuerpo) que del seno de ellos nombrasen uno que haciéndose intérprete de la opinión de todos manifestase lisa y llanamente las causas que en conciencia creyeran habían dado margen al conato de sedición”.<sup>9940</sup>

No encontrándose para ello inconveniente alguno --y por votación nominal-- se nombró al Teniente 2º Antonio Tassi (tenía una jerarquía menor a la de Paz, pero poseía el orden de mérito más alto), seguramente por ser el más locuaz y el que se encontraba en esa tenebrosa ocasión más entero, quien en su nombre y en el de los oficiales compañeros manifestó “...que juzgaba que la sublevación era debida a que el cuerpo está formado de **soldados revolucionarios**; que en Buenos Aires daban vivas a la **Unión Cívica** dentro del Cuartel”.<sup>9941</sup>

Preguntado el Tte. Cnel. López si creía que “...sean estas las causas que han dado margen al conato de sedición que debió estallar el 28 del mes ppdo. en el Regimiento de su accidental mando dijo que la manifestación del Teniente Tassi en representación de sus compañeros lo convence, pero que se va a permitir agregar una confidencia que le hizo el Cap. José M. Abogadro”.<sup>9942</sup> En efecto, el 30 de septiembre López le preguntó al Cap. Abogadro, quien recientemente había regresado de Buenos Aires, si conocía las causas que podían haber dado margen al conato de sedición a lo que el Capitán contestó con la siguiente significativa afirmación: “...Sr. esto no me ha tomado de sorpresa pues este cuerpo ha estado por sublevarse en Buenos Aires y en Resistencia [Chaco Austral]”.<sup>9943</sup> A renglón seguido, Abogadro declaró que “...fundaba su creencia por lo que había leído en los periódicos las dos veces que cita [Buenos Aires y Resistencia]”, y que lo dice para “...tranquilizar el ánimo del Comandante [López] quien muy afligido le había interrogado que se diría de lo acontecido en Buenos Aires”.<sup>9944</sup> Pero Abogadro, sospechando lo inevitable, añadía a su vez en aras de salvar la vida de quien fuera su asistente y ahora su acusador, que “...jamás el cuerpo había intentado sublevarse y que no tiene conocimiento se haya levantado”.<sup>9945</sup> Y el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello también había manifestado que creía que “...la causa que haya motivado el conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía, por haber pertenecido muchos de los soldados que forman parte del Regimiento a la última revolución”.<sup>9946</sup> Lo extraño del caso es que ninguno de los oficiales consultados haya sugerido la posible influencia de lo acontecido en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes unos meses atrás.<sup>9947</sup>

Pero si esto fue verdad y se insiste en averiguar las causas, es decir en creer que el conato sedicioso no fue un capricho individual de Bargas ni obedeció a razones o causas propias de la población fronteriza y obrajera de Formosa; y se concuerda además que Abogadro no fue el instigador militar, tal como López y Uriburu convinieron, ¿porqué extraña razón no se indagó acerca de los responsables civiles de la conspiración? Es decir, ¿porqué no se buscó si existió o no el compromiso de algún político Liberal o

Radical de Resistencia, de Corrientes o de Buenos Aires que hubiere tenido contactos con el soldado Bargas?

#### **J-VI-b.- Indisciplina Castrense como Causal.**

La lenidad disciplinaria tendría su origen en la academia militar francesa, de raíz napoleónica, fuente inspiradora hasta ese entonces de las academias chilena y argentina, aún no impregnadas por la doctrina Prusiana, que como más luego veremos recién comienza su penetración a comienzos de la década del 90.<sup>9948</sup>

En nuestro caso paradigmático, incorporado en las actuaciones de la justicia de instrucción militar, el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello había declarado el 16 de octubre que creía también recordar como causal del conato de sedición la lenidad o indulgencia de los oficiales para con la milicia, pues "...muchas veces al ser castigada la tropa por oficiales eran estos puestos inmediatamente en libertad por los jefes"<sup>9949</sup> A que Jefe se refiere no queda claro. Pero es posible suponer que se refiere al Jefe del Regimiento Coronel Julio Ruiz Moreno, cuyo asistente era el soldado Francisco Toranzo. Y para abonar su interpretación puramente política del evento frustrado, el acusado Cap. Abogado negó que la causal del conato sedicioso se hubiera originado en la injusta distribución del rancho, pues esa acusación la atribuía a una "...maldad de los que la encabezaban por cuanto en esa época la administración de los fondos y el racionamiento se hacía con toda equidad".<sup>9950</sup>

Asimismo, el Teniente 2º Antonio Tassi había declarado, en un fuerte e inusual tono autocrítico, que los oficiales del cuerpo (que en esos días estaban arrestados y sumariados y que se puede presumir se refería a los alféreces Muñóz, Paz, Perón y Redruello) habían "...contribuido en mucho sin darse cuenta a fomentar la sedición".<sup>9951</sup> Según Tassi, esto ocurría debido a "...sus **murmuraciones** imprudentes en presencia de la tropa y que recién se daba cuenta de la gravedad de la falta que habían cometido y la justicia con que habían sido castigados por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del Jefe accidental del Regimiento [Federico López]".<sup>9952</sup> Estas sugestivas como reveladoras declaraciones del Teniente 2º Tassi, formuladas ante el Consejo de Guerra verbal, pese a la gravedad de las imputaciones inferidas de no guardar la debida distancia simbólica con los subalternos soldados, no fue desaprobada por ninguno de los oficiales, lo que equivale decir que le prestaron voluntaria o involuntariamente su asentimiento, cuando aún no se sabía el desenlace que iba a tener el trágico acontecimiento. Encontrábanse presentes en el evento el Jefe de las fuerzas de la guarnición, el declarante Tte. Cnel. Díaz, el capitán Jose M. Abogado, los oficiales subalternos Tenientes Elías Paz y Antonio Tassi; y Alféreces Demetrio Márquez, José M. Muñóz, Neriz F. Redruello y Alberto Perón.

En cuanto a lo manifestado específicamente por el Teniente 2º Tassi en nombre del Teniente 1º Elías Paz,<sup>9953</sup> acerca de lo que creía "...pudiera haber influido en el espíritu de la tropa al conato de sedición algunas conversaciones entre oficiales en caso que estos la hubieran tenido y que oída por los asistentes [Bargas y Toranzo] hubiera repercutido en la tropa", el quinto testigo Teniente Paz aseguró --ya libre de la jaqueca o cefalea que lo había atormentado durante las deliberaciones del Consejo de Guerra-- al declarar ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre, "...no haber oído conversación imprudente jamás".<sup>9954</sup> Si no se opuso cuando dicho Teniente 2º Tassi habló de esa manera, lo fue "...porque como se lo había manifestado al señor Presidente del Consejo

anteriormente no se encontraba en condiciones...de darle cuenta absolutamente de nada por lo que deja expuesto más arriba [estar malo de la cabeza]”.<sup>9955</sup>

En tanto, el propio Teniente 2º Tassi también declaró el 16 de octubre comprender recién la gravedad de la falta que habían cometido y de “...la justicia del castigo recibido por desobedecer de acuerdo todos los oficiales las órdenes del jefe accidental del cuerpo [López]”.<sup>9956</sup> Si hubiesen tenido conocimiento y conciencia exacta de lo que pasaba, Tassi creía que “...no habrían criticado con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa; pero que conociendo ya la gravedad de la situación estaban resueltos a hacerse **quebrar los huesos** y quebrárselos a los que intentasen sublevarse”.<sup>9957</sup> Estas afirmaciones del Teniente 2º Tassi, que aludían a una supuesta crítica de la conducta de un superior (de quien no se aclara la identidad pero que debemos presumir se refiere al General Uriburu por su apoyo al Acuerdo Roca-Mitre), y a una aparente promiscuidad o amiguismo entre oficiales y soldados asistentes entabladas en ocasión de cebar mate (el Coronel Ruiz Moreno y su soldado asistente Toranzo; y/o el Capitán Abogado y su soldado asistente Bargas), y denunciadas en oportunidad del Consejo de Guerra verbal “...fueron escuchadas por todos y ninguno de los oficiales a cuyo nombre habló hizo observación ninguna que manifestase disconformidad”.<sup>9958</sup>

Pero en cuanto a la grave acusación que ventiló en el Consejo de Guerra el Tte. Cnel. López, que todos los oficiales “...acostumbraban criticar fuertemente los actos de sus superiores”, actitud que en el ámbito militar se la califica como **murmuración** y es casi tan grave como el delito de sedición que se le imputó al soldado Bargas, Uriburu concluía por no dar crédito a las acusaciones ventiladas tanto por el Tte. Cnel. López como por el Teniente 2º Tassi, y terminaron por exculpar y sobreseer a dichos oficiales, pues argüía que “...no prueban nada especial y particularmente contra el Capitán Abogado”.<sup>9959</sup>

Al día siguiente, 17 de octubre, el Fiscal Carpi, no resultando cargo alguno contra el Cap. Abogado y en vista de lo declarado por el 2º Jefe del Regimiento Federico López, pide al Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno que “...se sirva dictar las órdenes del caso para que el referido Capitán sea puesto en completa libertad”.<sup>9960</sup> Y un mes después, en noviembre, llegó la orden del Ministerio de Guerra, para que los Tenientes Tassi y Márquez se trasladen a Catamarca.<sup>9961</sup>

#### **J-VI-c.- Venganza como Causal**

En cuanto a otros motivos por los cuales el soldado Bargas se propuso sublevarse, el segundo testigo Sargento Distinguido Alberto Cáceres declaró que “...supone haya sido por alguna venganza o rencor”, y el tercer testigo Sargento Distinguido Eleodoro Quiroga declaró que a Julián Bargas se le “...han leído las leyes penales, pasado revista de comisario, hecho el servicio de su clase, y prestado el juramento de fidelidad a la bandera”, y que “...la conducta que observaba en ella hera regular y que los castigos que se le han aplicado han sido plantones y calabozo por diferentes causas, habiendo sido el último un plantón impuesto por el Cap. José M. Abogado, Comandante de la Batería, y que esto fue a consecuencia de un cargo que el referido soldado se negó a pagar”.<sup>9962</sup> Asimismo, Quiroga declaró que el referido soldado “...padecía del **defecto de la murmuración** por cuya causa ha recibido varios castigos”.<sup>9963</sup>

## **J-VII.- Ejecución sumaria como Escarmiento**

El Fiscal Mayor Carpi tomó declaración el 20 de octubre al Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu, tocándole a éste informar que "...el soldado Julián Bargas del precitado Regimiento de Artillería que se halla de guarnición en este punto, fue fusilado como a las once y media de la mañana del día tres del actual, por haberse plenamente comprobado por medio de las averiguaciones practicadas, que trató de sublevar el cuerpo y porque la gravedad de las circunstancias imponían esa medida por mas que fuese dolorosa".<sup>9964</sup>

A que "gravedad de las circunstancias", aludía Uriburu en ese entonces. Por cierto no se refería a ninguna circunstancia local de la frontera Chaqueña, sino a las circunstancias nacionales que se vivían en los cuarteles de toda la república a partir de que se desencadenara la revolución de julio de 1890, y seguramente a partir de la sublevación de julio de 1891 en Corrientes.<sup>9965</sup> Sin un "castigo inmediato y ejemplar", es decir un escarmiento, en ese momento mismo, pero en cabeza de un chivo emisario o expiatorio, que tuviera un efecto disuasorio sobre todos los cuadros del ejército, como se estilaba en el Antiguo Régimen colonial español y en la era Rosista (cabezas clavadas en picas a la entrada de los pueblos o en la plaza mayor), Uriburu alegó que "...los males habrían sido cien veces mayores, pues la sublevación se habría producido el día menos pensado y ya se puede suponer lo que entonces habría sucedido".<sup>9966</sup> Para la conservación y salvación del cuerpo y de estas apartadas poblaciones, argumentaba Uriburu, "...fue necesario proceder sin perder un instante en la forma y manera enérgica que se procedió".<sup>9967</sup>

Sin embargo, salta a la vista la existencia de una llamativa contradicción en el seno del poder, cuando por un lado el Comandante Uriburu hacer caer una culpa colectiva sobre alguien en particular, aunque fuere el eslabón más débil de la cadena jerárquica, y lo ajusticia para escarmentar o disuadir, y por otro lado el Poder Ejecutivo, mediante su Ministro de Guerra, oculta el luctuoso suceso tanto a la opinión pública como al parlamento.

## **J-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones.**

Finalmente, un mes después, en Noviembre de 1891, y como consecuencia de la crisis que sus extremadamente francas pero explosivas y auto-inculpatorias declaraciones habían ocasionado en el seno del cuerpo de oficiales del Regimiento, tanto el Teniente Tassi como su allegado el Alférez Demetrio Márquez fueron trasladados a un Regimiento en Catamarca.<sup>9968</sup> Tassi llegó a estar complicado en la Conspiración de Santa Catalina en 1892, luego alcanzó el grado de Teniente Coronel, luego de haber sido premiado con igual grado por el ejército Peruano, y más tarde cuando Coronel, fue designado Subdirector del Colegio Militar.<sup>9969</sup> Tres años después, en 1907, fue sumariado y procesado por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un superior, el General Saturnino E. García, falleciendo en 1938 a los setenta años de edad.<sup>9970</sup>

De los otros oficiales que sobrevivieron al soldado Julián Bargas, Uriburu ejerció la gobernación de Formosa hasta 1894 y falleció en Buenos Aires al año siguiente, en

1895. Ruiz Moreno, fue dado de baja a su solicitud y debido a su estado de salud en abril de 1893, pasó a retiro en 1900 como General de Brigada y falleció en San Luis en 1914.<sup>9971</sup> López desplegó luego sus andanzas en el monte chaqueño donde alcanzó el grado de Coronel, y se retiró en 1911, falleciendo el mismo año a los 56 años de edad.<sup>9972</sup> Abogado llegó a Coronel y se retiró en 1924, pero sugestivamente no llegó a General como sí fue el caso de su hermano menor Enrique. Elías Paz continuaba en el mismo Regimiento de Artillería en 1893 y llegó al grado de Mayor, falleciendo en 1905 a los 38 años.<sup>9973</sup> José M. Muñoz llegó a Teniente 2º en 1894, pero fue dado de baja por abandono de destacamento pasando seis meses de prisión en Santa Cruz.<sup>9974</sup> Neriz F. Redruello, llegó a Mayor y falleció en 1924 a los 56 años.<sup>9975</sup> Y Alberto Perón, llegó al grado de Teniente 1º, falleciendo en el servicio activo en 1996 a los 25 años, cuando su célebre sobrino tenía apenas un año de edad.<sup>9976</sup> Dada la prolijidad con que el legajo del Teniente Perón fue expurgado cabe presumir que existieron elementos comprometedores, que deben estar vinculados a su extraña muerte prematura.<sup>9977</sup> Por último, el Regimiento fue trasladado en 1892 a Villa Nueva (actual Villa María, Córdoba), y en su cuerpo de oficiales aún continuaba revistando el Teniente Perón.<sup>9978</sup>

De los primeros delatores soldados Francisco Toranzo y Roque Roldán, y de los otros soldados complicados Ramón Plaza, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, nada he podido saber hasta el presente, ni tampoco si entre los conjurados existió alguno que continuara consecuente con el ideario político que Bargas les legara. Lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producen fusilamientos perpetrados por el ejército de línea, y dos años después se convierte en el epicentro de la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).

## **Capítulo- IV-C-11      Orden consensual de frontera o “Misión Civilizatoria”.**

### **Índice del Capítulo IV-C-11**

#### **K.- Orden Consensual de Frontera o “Misión Civilizatoria”.**

- K-I.- Disputas de estrategia militar.
- K-II.- Colonias indígenas militares.
- K-III.- Filantropía evangelizadora extorsiva
- K-IV.- Bandoleros y gauchos matreros
- K-V.- Alarmas infladas o infundadas.
- K-VI.- Conflictos intra-tribales.
- K-VII.- Aluvión de colonos étnicamente discriminados.
- K-VIII.- Conclusiones.

### **Palabras Claves**

Alarmas infladas o infundadas--Aluvión de colonos étnicamente discriminados--  
 Bandoleros--Colonias indígenas militares--Conflictos intra-tribales--  
 Filantropía evangelizadora extorsiva--Gauchos matreros--Misión civilizatoria--

Orden consensual de frontera-

## **Keywords**

Banditry--military indigenous colonies--intra-tribal conflicts--civilization mission--consensual order.

## **K.- Orden Consensual de Frontera o “Misión Civilizatoria”.**

Culminada a sangre y fuego la denominada conquista del desierto (1880-84), y resquebrajado el orden interno del estado patrimonial-burocrático (1880-1890), a partir de la Revolución del Parque (1890), la *intelligentzia* militar oficial (Capdevila, Victorica, Godoy, Riccheri) tuvo que asimilar la crisis ideológica desatada innovando en materia de planes y proyectos estratégicos, entre los cuales debía atenuar o disfrazar la naturaleza pretoriana de sus empresas de conquista, con el último objetivo de contribuir a restaurar la imagen del orden oligárquico erosionado.

En América Latina, durante la larga etapa de formación del estado-nación y el orden burocrático-administrativo, como superador del estado colonial y del orden patrimonial, todos los ejércitos han debido --según lo ha cerciorado Nunn (1972, 1975)-- desempeñar roles o misiones internas, entre ellas la de integrar aquellos espacios geográficos abandonados por la labor “civilizatoria”. A estos últimos se los conocía, durante los últimos años del siglo XIX, como la “misión civilizadora”, lógica derivación de la partición de los espacios coloniales (África, Asia y Medio Oriente) y de la construcción del mito de un progreso indefinido.<sup>9979</sup> A semejanza del estado colonial, que prohibía la formación de los llamados pueblos de indios, la conducción de los ejércitos modernos o ejércitos de línea se planteaba también ampliar y profundizar los legados modernizadores del renacentismo colonial, del reformismo Borbónico y de la generación del 80, incorporando en las fronteras indígenas la “misión civilizatoria”, consistente en campesinizar o transformar pacíficamente las beduinizadas tribus nómades en comunidades sedentarias y urbanizadas, y a sus integrantes en campesinos o peones obreros jornalizados o proletarizados.<sup>9980</sup>

La misión del ejército --en lo que vendría a ser una tardía autocrítica del imaginario y del programa de la Generación del 80-- no debía consistir para el coronel Teófilo O'Donnell, “...penetrar en el Chaco sable en mano, a perseguir y a diezmar a los indios, cazándolos como a fieras a través de la espesura”.<sup>9981</sup> No, la misión del ejército para O'Donnell, en una suerte de postrera reivindicación de las estrategias defensivas de Pedro Andrés García y del Gobernador Adolfo Alsina así como del ideario revolucionario del Parque (1890), debe ser “...eminentemente civilizadora y humanitaria. El ejército debe ir a poblar el Chaco y a transformarlo atrayendo hacia él las corrientes de la inmigración y del trabajo, y una de sus principales obras debe ser atraer al indio, protegerlo, civilizarlo, hacerle amar el trabajo y convertirlo en un elemento de la vida racional”.<sup>9982</sup>

Este undécimo capítulo lo dividiremos a su vez en siete (7) apartados, considerando en primer lugar las estrategias militares implementadas; seguido luego por las colonias indígenas militares; luego con la filantropía evangelizadora como dispositivo de

extorsión; el bandolerismo y los gauchos matreros; las alarmas infladas o infundadas; y los conflictos intra-tribales; y por último, un análisis del aluvión de colonos y su discriminación étnica.

### **K-I.- Disputas de estrategia militar.**

A propósito de las numerosas expediciones militares ensayadas en la frontera norte del Chaco, debemos destacar que también en ella se produjo una profunda división en materia de políticas a implementar, donde prevalecieron las estrategias puramente ofensivas del arma de caballería, orientadas por el Teniente Coronel Napoleón Uriburu primero (1870, 1873, 1891-93), Benjamín Victorica en 1884, el Coronel Enrique Luzuriaga en el período (1893-1905), el Mayor Carlos R. Sarmiento en 1905, y posteriormente el Coronel Enrique Rostagno (1911). Rivalizando todos ellos con las estrategias meramente defensivas de los Coroneles José María Uriburu (1901) y Teófilo R. O'Donnell (1906-09).<sup>9983</sup>

En las Instrucciones entregadas al Teniente José C. Irurueta en Octubre de 1901, el Coronel José María Uriburu recomendaba a sus oficiales subalternos: "...al ver a su fuerza y sentir a Vds. [los indios] se alarmarán y es muy posible que durante su camino encuentre grupos de indios que huirán a su presencia y hasta dispararán sus armas sobre Vds., nada de esto debe prevenirlo a Vd. contra ellos, siempre que el disparo de sus armas no produzca daño en el personal de tropa a sus órdenes".<sup>9984</sup> A estas manifestaciones de resistencia del indígena, J. M. Uriburu ordenaba a la fuerza al mando del Teniente Irurueta que debía mostrarse "...indiferente y procurará con su impasibilidad, en todos los momentos, hacerlos comprender que no va Vd. a perseguirlos ni perjudicarlos, haciéndolos hablar con el intérprete Juárez Celman".<sup>9985</sup> Al disparo de armas de los indios, Uriburu ordenaba que la fuerza no debe contestar, "...poniéndola al abrigo de esos tiros, haciéndola ocultar. La fuerza a sus órdenes hará uso de sus armas solo en caso extremo de tener que defenderse".<sup>9986</sup> Y al referirse a los individuos de tropa que habían reprimido a los indios en el pasado, como el propio intérprete Juárez Celman (quien contaba con gran prestigio por su dominio de múltiples códigos, como lo fueron en el pasado Santiago Saravia y Juandola),<sup>9987</sup> Uriburu alertaba cuidar que "...no vayan a producir acto ninguno aisladamente, que desdiga de los propósitos que su comisión lleva".<sup>9988</sup>

Cinco años después, en 1906, y al retorno de su segundo viaje a Europa (Italia y Suiza), donde conoció la Escuela de Tor di Quinto (Roma) y donde probablemente haya frecuentado los mismos círculos intelectuales que conoció José Ingenieros, el Coronel Teófilo R. O'Donnell, quien poseía una vasta experiencia en la frontera sur, irrumpe como Inspector del arma de Caballería en la beligerante y frustrante estrategia militar de la conquista del Chaco.<sup>9989</sup> Para T. O'Donnell, el desaliento reflejado en los cuadros de oficiales "...los conduce poco a poco a perder el sentimiento del arma y su espíritu de empresa, condiciones indispensables para la existencia de una Caballería audaz y emprendedora".<sup>9990</sup> Poco más tarde, a fines de 1907, el Ministro de Guerra General Rafael Aguirre crea la División Caballería del Chaco con los regimientos 5, 6, 7 y 9 de caballería, y designó a O'Donnell como su Jefe, quien habría de durar en el cargo apenas un par de años.<sup>9991</sup> Aguirre había ascendido a coronel en 1901 y se le había confiado una misión de estudio en Francia, y con ese motivo hizo un viaje especial al Maghreb para conocer la colonización militar de Orán y de Argel.<sup>9992</sup> Para esa época,

tanto Aguirre como O'Donnell deben haber estado al tanto de la noción de colonia agrícola militar difundida en sus conferencias por el General francés Lyautay.<sup>9993</sup>

O'Donnell fue un personaje estigmatizado y ocultado por la camarilla militar Roquista enquistada en el Estado Mayor. Esta camarilla le guardaba celos por su pertenencia al círculo político Modernista y por el éxito publicitario o mediático que su singular epopeya chaqueña tuvo en la prensa capitalina.<sup>9994</sup> Epopeya esta última que venía a poner en tela de juicio lo alcanzado un par de décadas atrás en la Frontera Sur. La Jefatura de la 2ª Región Militar, con asiento en Paraná, de la cual dependía Teófilo, pasó a ser conducida por uno de los “próceres” de la Conquista del Desierto, el General Rufino Ortega y su Secretario el Coronel Enrique Rostagno, ex profesor de historia de la guerra en el Colegio Militar y compañero de promoción del Ministro de Guerra General Angel Allaria.<sup>9995</sup> Para peor, el Coronel Rostagno, que había sido secretario privado del Gral. Riccheri y pertenecía al círculo Roquista, profundamente enemistado al círculo Modernista (Carcanista y saenzpeñista), guardaba un profundo rencor indirecto, al haber sido perjudicado en su carrera por el hermano mayor de Teófilo, el entonces Coronel Carlos E. O'Donnell.<sup>9996</sup>

Desde ese puesto y en combinación con el entonces Mayor Carlos R. Sarmiento, subordinado de Teófilo, le tendieron una celada para evitar que ascendiera a General.<sup>9997</sup> Lo lograron, y con ese motivo Teófilo --alegando su “mal estado de salud”-- pidió el retiro y se fue a Francia, donde falleció mucho después.<sup>9998</sup> El pretexto fue haber cometido el error de solicitar al Congreso una concesión de tierras de 25.000 hectáreas, para su proyecto de Colonias Militares Indígenas, sin pasar por la instancia ministerial. Pero tampoco O'Donnell se ahorra adversarios, pues paralelamente denunciaba al gobierno de Santa Fe por su desinterés en la custodia de la frontera y a la Iglesia por el rol extorsivo que desplegaban las Misiones religiosas en su relación con el aprovisionamiento de las fuerzas de línea.

Teófilo tenía una fuerte personalidad, y un elocuente estilo literario y conceptual, que lo debió haber adquirido por la influencia de su tío Lucio V. Mansilla, a quien sirvió cuando revistaba en la campaña militar de Neuquén, y también por su fugaz estadía en el Colegio Militar y en las Agregadurías Militares de España (1889), de Suiza y de Italia (1904). Atravesó el Chaco en varias oportunidades, y se entrevistó con multitud de caciques indios que le tenían una gran estima.<sup>9999</sup> Hasta que en 1909, sus múltiples adversarios dentro del Ejército le montaron varias provocaciones agrediendo a Donato Matolí, cacique Toba de la tribu de los Pilayás, quien se vengó fieramente desatando el desmoronamiento de la política dialoguista y conciliatoria de O'Donnell.<sup>10000</sup> Era candidato seguro al generalato, pero como presumo que a diferencia de su hermano Carlos era un conservador modernista muy crítico, cayó en desgracia con el nuevo establishment militar. Y para terminar de acorralarlo, también le montaron una patraña con la mujer del enfermero de la Brigada.

O'Donnell sostenía que “...aún a pesar de las persecuciones sangrientas de que han sido víctimas los indios”, las poblaciones de colonos “...no se han extendido mayormente y que los indios subsisten y vagan por los bosques”.<sup>10001</sup> Para O'Donnell, estos “errores de sistema”, fuerza es decirlo, “...lejos de subyugar al salvaje, solo lograron que este odiara a la civilización y temiera al Ejército como un elemento de exterminio de su raza”.<sup>10002</sup>

Algunos militares, manifestaba O'Donnell, por "...espíritu guerrero, y muchos de los pobladores animados tan sólo de intereses personales, extraviaron a la opinión con su propaganda exagerada sobre el carácter y temperamento del indio del Chaco, de su clima inhospitalario, llegando así a través del tiempo y del velo que cubría estas selvas, a formarse leyendas que han alejado su colonización, postergando su civilización y detenido el usufructo de sus magníficos y ricos bosques, privando a la nación de una de sus fuentes de mayor riqueza, ganadera y agricultora".<sup>10003</sup>

Pero es necesario confesarlo, admitía O'Donnell, "...aún a despecho de ciertas opiniones del vulgo, que el indio del Chaco, dócil y sin hábitos guerreros, no ha deseado otra cosa siempre, que la protección del Gobierno Nacional, arrastrado por su situación precaria de hambre, de infortunio y quizás también impulsado por un secreto bien estar que adivinaba en la nueva existencia del hombre civilizado a quien trataba y observaba durante sus estadías en los pueblos a que acudía en demanda de trabajo agrícola o corte de madera".<sup>10004</sup>

Es necesario, sostenía O'Donnell, "...conocer el origen del mal para extirparlo --y digo esto para poner en claro los motivos que inducen al indio del Chaco al robo— poniéndome así a cubierto de las observaciones que pudiéranse citar a propósito de los robos cometidos con más o menos frecuencia por ellos motivo de largos y alarmantes artículos de ciertos diarios de la Capital".<sup>10005</sup> En su última expedición de 1907, O'Donnell había "...indagado a muchos pobladores que viven aislados en el Centro del Chaco ocupando tierras fiscales, en su mayoría propietarios de 400 a 1000 cabezas cuidadas solo por uno o dos peones, si son continuamente robados por los indios, y salvo uno que otro, todos me han manifestado que rara vez lo han sido y esto, en una insignificancia de animales. En esta y otras circunstancias se revela que el instinto del robo en el indio del Chaco, no tiene las proyecciones, que se lo quieren atribuir. Concluidos sus frutos silvestres y escasa la caza de que se alimentan en ciertas épocas del año, paralizados los trabajos de la zafra y de los obrajes, la suprema ley de la necesidad más poderosa que el temor a la represión, lo inducen al robo por hambre, así se lo ve robar unas cuantas vacas, lo escasamente necesario para alimentar sus familias, animales que devora en el oculto y enmarañado aduar".<sup>10006</sup>

La lógica nos induce a creer, argumentaba O'Donnell, que "...buscar de facilitar al indio los medios de que se gane su propia subsistencia es ponerlo en condiciones de que cese de allanar esta necesidad imperiosa por medio de procedimientos criminales y que se radique alrededor de la tierra que le produce bienestar. Con el fin de justificar más aún la razón de esta lógica, durante mi reciente expedición al interior del Chaco, hice por intermedio de indios castellanos, citar en Napalpí a los principales caciques tobas y mocovíes que habitan las selvas, acudiendo a mi llamado, los jefes de tribus Pedro José, Manuel José Amarilla y otros de los que más mal nombre gozan por sus tendencias nómades y guerreras y se han comprometido a presentarse a las fuerzas nacionales con sus súbditos inmediatamente que se les llame para proporcionarles tierras de labranza con que puedan dedicarse al trabajo".<sup>10007</sup>

## **K-II.- Colonias Indígenas Militares**

Las Colonias militares de indígenas y la concepción de la urbanización y asimilación cultural del indígena fueron ideas que --ya sea a través del proyecto de O'Donnell o del

de su superior jerárquico el Ministro de Guerra Rafael Aguirre-- se tomaron prestado de las prácticas colonialistas francesas en Senegal (Africa).<sup>10008</sup>

Si para O'Donnell, la idea del Gobierno era "...civilizar rápidamente este territorio, nada podría mejor a mi entender facilitar sus planes que la formación de colonias indígenas militares, cuyo proyecto me permito adjuntar a su estudio y consideración."<sup>10009</sup> Este sistema de colonias indígenas reuniría, a juicio de O'Donnell, las ventajas "...de poblar el territorio con hombres apropiados al clima, civilizar y educar a la vez a las nuevas generaciones de indígenas que día a día nacen en las selvas bajo el ambiente nómada de sus progenitores siguiendo en el estado salvaje de su origen".<sup>10010</sup> Por otra parte la formación de estas Colonias, no importaría para O'Donnell, bajo ningún concepto, "...descuidar la vigilancia de estos desiertos".<sup>10011</sup> Creadas las Colonias, los mismos Regimientos establecerían "...su red de fortines en menor escala, hacia delante, constituyendo cada uno de ellos una pequeña población indígena sujeta a la administración y control de la dirección general. El origen de los grandes pueblos, principiando por la vieja Roma, se fundó bajo estas bases. Tranquilizado el ánimo de los hombres que buscan su fortuna en las rudas tareas del desierto que había desaparecido el temor que se tiene hasta hoy infundado del indio, acudirían a aumentar las poblaciones y en pocos años los misterios del Chaco habrán desaparecido, reemplazados por florecientes campiñas y adelantados pueblos".<sup>10012</sup>

Dichas colonias se deberían haber constituido a juicio de O'Donnell, al principio y como a título de ensayo, sobre la base de un Regimiento de Caballería, debiendo ser su Jefe "...el administrador y director de ella, teniendo un Intendente Civil agrónomo a sus órdenes. Cada colonia abarcará una extensión de 25.000 hectáreas las cuales serán subdivididas en chacras de diez hectáreas cada una, que se adjudicarán por familias a los indígenas a medida que vayan presentándose a las fuerzas nacionales, dichas colonias se dedicarán al cultivo del maíz, algodón, maní y otras que se produzcan en la zona".<sup>10013</sup> Estas colonias podrán ser "...a la vez mixtas o, es decir, compuestas asimismo de familias de la inmigración, cuyo contacto y ejemplo de labor de la tierra, serían de gran utilidad al indio. A fin de evitar los abusos de que han sido víctimas hasta hoy los indígenas por parte de los dueños de obrajes y establecimientos agrícolas, se establecerá un protectorado sobre ellos, debiendo los propietarios, cada vez que necesiten brazos indígenas para sus propiedades solicitarlos al Jefe militar de la Colonia, quien estipulará el precio del trabajo de cada uno de ellos".<sup>10014</sup>

### **K-III.- Filantropía evangelizadora extorsiva.**

La misión evangelizadora, empresa que pertenecía a la esfera religiosa, debería teóricamente coincidir con la misión civilizatoria emprendida por los gobiernos laicos. Sin embargo, los misioneros que desde 1857 existían en el Chaco, no daban el resultado que se esperaba, como el Comandante de la Frontera Teniente Coronel Napoleón Uriburu lo hizo conocer en su informe de 1870; pues "...aunque el espíritu de los misioneros esté predispuesto al sacrificio, su sola abnegación no les proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo empresas de esta magnitud, que siempre quedan reducidas a consecuencia de la falta de recursos a tentativas infructuosas que esterilizan los sacrificios de los RR. PP".<sup>10015</sup> Esa falta de recursos desacredita una institución "...que en otras épocas y con otros medios, dio por resultado la formación de pueblos como los del Paraguay".<sup>10016</sup> Reconociendo las ventajas que se podrían reportar de

formar reducciones o misiones militares, el Coronel Uriburu recuerda que "...traté de este asunto con el R. P. Fray Joaquín Remedi, prefecto de las misiones del Chaco, quien por su larga experiencia, por el contacto frecuente con los indios y las observaciones hechas con bastante tino sobre su carácter y costumbres, encontró lo más prudente esta clase de establecimiento, con preferencia al que actualmente existe sin resultado ventajoso alguno, no obstante poseer el Padre Remedi todas las condiciones requeridas para llevar a cabo este pensamiento".<sup>10017</sup>

Y cuarenta años después, en un reportaje periodístico que a fines de 1908 se le hizo al coronel Teófilo O'Donnell, acerca de las misiones religiosas del Chaco, se le preguntó si dichas Misiones "¿Son eficaces para el sometimiento del indio?. Y este respondió: -- Ha tocado usted un punto que me disgusta un poco. Las misiones tienen en realidad el mismo propósito que nosotros: civilizar al indígena y pacificar el Chaco. Desde luego sería indispensable una ayuda mutua, puesto que las tropas ofrecen a los misioneros la garantía de su custodia eficaz".<sup>10018</sup>

Pero en lugar de estos propósitos, en las misiones religiosas del Pilcomayo y del Bermejo, el Coronel O'Donnell denunciaba que tratan "...de negociar con las fuerzas de línea; en vez de ayudarlas en lo posible, ya que la campaña se hace con la mayor economía".<sup>10019</sup> Las Misiones religiosas habían incurrido en el mismo delito de aprovisionamiento fraudulento que practicaban las casas comerciales porteñas como Lezica y Lanús durante la Guerra del Paraguay y Gregorio Torres y Cía. durante la Revolución del 90 y las Maniobras de 1992, pues habían "...cobrado 150 pesos por tonelada de maíz".<sup>10020</sup> Este era a todas luces un precio exorbitante, "...porque, para cultivar y cosechar el cereal, emplean el trabajo del indio, que les cuesta muy poco. Con la agravante de que las tierras de que disponen para los cultivos, les han sido cedidas por el gobierno federal, el cual les concede, además, la custodia de las fuerzas del ejército, a las cuales ellos procuran explotar. Es inconcebible".<sup>10021</sup>

La misión franciscana San Francisco de Laishi, 20 leguas al norte de Formosa, fundada en 1900, era a juzgar por el Diario de Marcha del Capitán Baldomero Álvarez (h), "...una de las más importantes del Chaco, a orillas del río Salado."<sup>10022</sup> Esta misión, regentada por un sacerdote y un lego, "...tiene 100 familias tobas a las que raciona diariamente, sirviéndose para ello en parte, de los mismos productos que los indios venden a los padres. El campo, propiedad de la misión, es de 40 leguas cuadradas. El edificio es de palmas. Junto a la capilla está el almacén y tienda, lo que hace la misma impresión de un teatro con su correspondiente despacho de bebidas. Poseen un aserradero importante, ligado por teléfono a la administración de la colonia, y en estos momentos establecen una línea telegráfica que liga el establecimiento con las costas del río Paraguay. Cuentan con 30 kilómetros de alambrado, dos buques remolcadores y más de mil vacas".<sup>10023</sup>

La cosecha había producido en 1908 un centenar de toneladas de maíz "...y 17.000 litros de miel de caña. El pago del trabajo del indígena es muy curioso. Los indios entregan su cosecha a medias a la administración de la colonia religiosa: ésta les paga en vales, que no tienen valor sino en la casa de negocio del establecimiento, donde los artículos tiene ya un recargo sobre su precio primitivo. De esto resulta un negocio que de todo tiene menos de ejemplar, dado que la misión de los religiosos es llevar al salvaje la palabra de Dios únicamente. Es un contraste doloroso el que forman estas colonias,

donde se viola hasta las leyes de la nación, pues tienen registro civil por su cuenta, con el indio hambriento y cubierto de mugre”.<sup>10024</sup>

#### **K-IV.- Bandoleros y Gauchos Matreros**

Entre las subculturas vigentes en la frontera del Chaco, se destacó la correspondiente al bandidaje. En cada oportunidad en que ocurrían malones, la prensa porteña opositora explotaba la tragedia, anunciando que los indios del Chaco “...han hecho de las suyas en la frontera de aquel territorio, atropellando, robando, cometiendo todo género de sanguinarias tropelías”.<sup>10025</sup> No cabe ante esos casos sino repetirse lo que ya dijimos: que existe necesidad, de barrer de bandoleros la frontera del Chaco, de suprimir ese bandidaje sea o no sea indio, pero de suprimirlo definitivamente porque su presencia constituye un baldón y una vergüenza para el país”.<sup>10026</sup>

*El Diario* cuenta, en septiembre de 1908, que el coronel O'Donnell, “...de acuerdo con los gobernadores del Chaco y de la provincia de Santa Fe, ha dispuesto que 30 hombres del 7 de caballería, en unión de las policías de los departamentos fronterizos, lleven una batida a los bandoleros que merodean en esas comarcas, tranquilizando así a los pobladores. La noticia no puede ser más agradable ni demostrar mejor la veracidad de cuanto manifestamos oportunamente”.<sup>10027</sup> El coronel O'Donnell, después de estudiar la situación de aquel paraje “...ha ordenado esa medida, confirma lo que hemos dicho, desde que dispone lo que proponíamos”.<sup>10028</sup> También anuncia que los vecinos de El Chorro y Los Tobas “...acaban de pedir el auxilio de las fuerzas nacionales para seguridad de sus vidas y sus haciendas, amenazadas por 3000 indios bien armados y municionados que están espiando una coyuntura favorable para caer sobre esas poblaciones”.<sup>10029</sup>

#### **K-V.- Alarmas infladas o infundadas.**

Con referencia a la mayor parte de las correrías y los malones del Chaco de que se hablaba en ese entonces, el Coronel O'Donnell sostenía que si no son “...una mentira constituyen en cuando menos una gran exageración. No he de negar que existan indios, agregaba indios alzados, que roban ganados y que a veces asesinan; pero la más de las veces los cuatreros y los autores de asaltos no son indios, propiamente dichos, sino bandidos que huyendo de la policía se guarecen en el Chaco. Además, muchos de esos indios alzados, han sido mansos, han sido elementos de rudo trabajo, que han huido a los bosques y se han hecho cuatreros, cansados de ser víctimas de explotadores que los han esquilado y hecho objeto de toda clase de abusos y malos tratamientos”.<sup>10030</sup>

A semejanza de las alegaciones de canibalismo difundidas en el Congo por los mercaderes del caucho para presionar al gobierno colonial para que pacifiquen el territorio, las alarmas de malones indígenas en el Chaco “...son muchas veces propaladas sin fundamento por bolicheros que buscan el envío de tropas para explotarlas o de hacendados que quieren dejar el ganado abandonado para que le custodie el ejército, pero esas alarmas infundadas hallan eco precisamente porque hay otras que tienen razón sobra de ser y son las que se refieren a los atropellos de bandidos de la frontera”.<sup>10031</sup>

Según el informe del coronel O'Donnell, los indios son "...de índole pacífica, casi tímidos, amedrentados por la cruel y despiadada persecución que las fuerzas militares les han hecho. La leyenda del peligro indígena responde a incitaciones de empresarios que explotan a sus peones y les usurpan sus legítimos salarios, valiéndose del terror militar que los persigue a pretexto de ser bandoleros, cuando en realidad son víctimas de la codicia y la impunidad de los patrones".<sup>10032</sup>

#### **K-VI.- Conflictos intra-tribales.**

Entre los matacos y tobas, los chunupies o vilelas ocupaban según lo consigna el Teniente Coronel Napoleón Uriburu en 1872 "...muy corto espacio de terreno desde la encrucijada de Macornita hasta la Laguna Verde han ido desapareciendo gradualmente a consecuencia de las guerras con sus dos vecinos y las últimas familias que existían han emigrado en 1871 a las costas del Paraná, en donde han encontrado un asilo seguro en las Misiones establecidas al Frente de la Ciudad de Corrientes que la componen indios de su propia nación".<sup>10033</sup>

Los indígenas tenían entonces sus tolderías en las márgenes del río Pilcomayo (Chaco). La mayor parte "...pertenecen a las tribus de los Tobas y Pilajes, antes enemigos y hoy [1908] aliados para defenderse de otras tribus ubicadas al Norte del Chaco Paraguayo, a los que temen. Esos indígenas se presentaron varias veces en los campamentos de las expediciones, en los que permanecieron muchos días, proveyéndose de ropas y alimentos".<sup>10034</sup>

#### **K-VII.- Aproveccionamiento de Fortines y Racionamiento de Tolderías.**

Para la provisión de las Guardias el ejército contratava el aprovisionamiento con empresarios privados, quienes por contar con los medios de transporte necesarios para alcanzar largas distancias, facturaban las vituallas a previos exorbitantes. Para esa tarea se elegían aquellas fechas con menor frecuencia de precipitaciones, por el estado de los caminos. El 8 de octubre de 1908, de Resistencia (Chaco), salieron con gran celeridad con destino a la Guardia General Lavalle, "...trece carros del proveedor Señor Cuesta, conduciendo víveres para las fuerzas destacadas en toda la extensa línea del Bermejo, que hace días están sin racionamiento. No obstante la intrepidez y el esfuerzo de los encargados de esta comisión, y de la buena dotación de bueyes y demás elementos que lleva, se cree que el viaje será penoso y tardío, dado el pésimo estado de los campos que tienen que pasar sin caminos conocidos".<sup>10035</sup>

#### **K-VIII.- Aluvión de colonos étnicamente discriminados.**

La creación de nuevas colonias a partir de 1907 y la instalación del ferrocarril de Barranqueras al oeste, inició "...una nueva etapa colonizadora en el Chaco, la ocupación de las tierras y el aumento de la población".<sup>10036</sup> Pero en esta nueva etapa, el aumento demográfico se produjo fundamentalmente "...por el ingreso de pobladores procedentes de las provincias y países vecinos, principalmente correntinos y paraguayos. Entre 1895 y 1914, arribaron al Chaco unos 3400 paraguayos y 12.608 correntinos, llegando a superar estos

últimos a los pobladores de origen extranjero que en 1920 totalizaban solamente 11.448 personas en el territorio”.<sup>10037</sup>

## **K-IX.- Conclusiones**

La difusión de la “Misión Civilizatoria” como programa político del establishment militar pretoriano se afianzó a imagen y semejanza de las aventuras colonialistas Europeas, experimentadas en África, Asia y Medio Oriente, que la prensa periódica ilustraba diariamente. Los entretelones y entresijos de dicha “misión civilizatoria” se vieron afectados por la participación de otros actores, esferas y niveles que contribuyeron a su distorsión, tales como las misiones religiosas, los colonos extranjeros, y el matreraje o bandolerismo criollo. Las condiciones ecológicas (sequías, inundaciones), que inducían los malones y los reacomodamientos geográfico-espaciales de las diversas tribus indígenas, también desempeñaron un rol determinante, postergando la penetración de las corrientes migratorias colonizadoras.

A continuación estudiaremos los condicionantes imperiales (exógenos) y locales (endógenos) de dicha burocracia militar pretoriana, destinados a contrarrestar primero y a obstaculizar después todo ensayo de reforma o transformación.

## **Epilogo-Sección IV-C.-**

La imposición de un orden burocrático pretoriano ocultaba, como su contrapartida insurreccional, una profunda desestabilización de la relación de fuerzas que se daba entre diversos actores del tablero dirigencial. Sin duda, el desarrollo tecnológico y la consiguiente expansión comunicacional favorecieron la efectividad intimidatoria de la represión. Este incremento intimidatorio se observa claramente al comparar el éxito militar de la represión de 1905 con respecto a la de 1893, así como también al cotejar el éxito militar de la conquista del Chaco en 1911 con respecto a las compañías militares de las décadas de 1870 y 1880.

El despliegue del liderazgo y las virtudes morales que lo acompañaban, así como el ámbito de la disciplina han sido dimensiones cuyo espacio ha fluctuado históricamente a remolque de las doctrinas militares, en una suerte de sístole y diástole o expansión y contracción permanentes, gobernadas a su vez por las teorías hegemónicas vigentes en la esfera política. Cuanto más intenso el autoritarismo implícito en las teorías políticas mayor era el rigor de la disciplina militar implantada y de la intensidad del orden pretoriano, y menor la capacidad de crítica y debate. Por el contrario, cuanto más alto el grado de democratización de las teorías políticas prevalecientes menor era la severidad de la disciplina, y más factibles la producción de un clima de debate y deliberación y de actos de rebelión y desobediencia a los mandos superiores.

La difusión de la “Misión Civilizatoria” como programa político del establishment militar pretoriano se afianzó a imagen y semejanza de las aventuras colonialistas Europeas, experimentadas en África, Asia y Medio Oriente, que la prensa periódica ilustraba diariamente. Los entretelones y entresijos de dicha “misión civilizatoria” se

vieron afectados por la participación de otros actores, esferas y niveles que contribuyeron a su distorsión, tales como las misiones religiosas, los colonos extranjeros, y el matreraje o bandolerismo criollo. Las condiciones ecológicas (sequías, inundaciones), que inducían los malones y los reacomodamientos geográfico-espaciales de las diversas tribus indígenas, también desempeñaron un rol determinante, postergando la penetración de las corrientes migratorias colonizadoras.

## **Sección IV-D.- Condicionantes globales y locales de una burocracia militar pretoriana.**

Analizado en la tercer sección el orden burocrático-oligárquico y la rígida disciplina instaurada en las instituciones armadas, que se enmarcaban en la adopción de un nuevo orden pretoriano, propio de una modernidad que fue tardía y resultó a la postre traicionada, corresponde ahora que estudiemos los condicionantes locales (endógenos) e imperiales (exógenos) de dicha burocracia militar pretoriana.<sup>10038</sup> Estos condicionantes estuvieron destinados a neutralizar primero y a impedir después todo atisbo de política reformista.

Esta cuarta y última sección la desarrollamos en cuatro (4) capítulos, dedicados a la estrategia, operaciones y logística como sustrato militar del estado pretoriano, al desviacionismo militarista como condicionante de la vida castrense, al segregacionismo estructural como deslegitimador de la burocracia militar, y a la construcción del enemigo interno en el doble contexto geopolítico de una amenaza revolucionaria y de una Paz Armada.

### **Capítulo IV-C-12**

#### **Estrategia, operaciones y logística en la política pretoriana**

- L.- Estrategia, operaciones y logística como sustrato militar de la política pretoriana
  - L-I.- Estrategia militar y diagramación institucional y material.
  - L-II.- Operaciones, y modernización tecnológica importada y postergación de una industria nacional.
    - L-II-a.- Secuelas de la adquisición del material de guerra en Europa.
    - L-II-b.- La guerra europea y la industria militar nacional.
  - L-III.- Logística para el abastecimiento, movilidad y concentración de tropas.
    - L-III-a.- Logística de las vituallas, la sanidad y el vestuario.
    - L-III-b.- Logística comunicacional y del transporte
    - L-III-c.- Infraestructura edilicia del ejército
  - L-IV.- Conclusiones.

#### **Palabras Claves**

Logística-intendencia-abastecimiento-acantonamiento-estrategia-táctica-tecnología-armamento importado-

## Key Words

Logistics-military strategy-tactics-technology-imported weaponry-

## Introducción

En el estudio de la organización militar, hemos de incursionar en la estrategia militar y la diagramación institucional y material; en la operaciones, la tecnología militar importada y la postergación de una industria nacional; y en la logística para el abastecimiento, movilidad y concentración de tropas.

### L-I.- Estrategia, operaciones y logística como sustrato militar de la política pretoriana

La práctica de fundar y renovar instituciones, incluidas las militares, ha sido siempre la actividad central de la política.<sup>10039</sup> En esa tarea, desde la antigüedad egipcia, griega y romana se ha venido cuestionando la balanza de poder interna de ejércitos y armadas, el rol colonizador de las mismas, y el equilibrio entre las dos fuerzas (ejército y marina) y entre las tres armas (caballería, artillería e infantería).<sup>10040</sup> En cuanto a la estratificación y funciones de la jerarquía castrense, con la revolución militar gestada en Europa durante las guerras de religión (siglo XVI), aquella quedó integrada por rangos, sistemas y ordenes de mando crecientemente estandarizados y por una tajante división formal entre las tres armas tradicionales (infantería, caballería y artillería) y sus respectivos departamentos de ingeniería y suministros.<sup>10041</sup>

En el Río de la Plata, cuando la guerra con el Imperio de Brasil, fue vital para el éxito de la misma la flexibilidad en la composición de las tres armas.<sup>10042</sup> De igual forma cuando la guerra con el Paraguay de López (1864-68) lo determinante en el triunfo del Paso de Humaitá fue el equilibrio entre la armada brasileña y los ejércitos aliados.<sup>10043</sup> Pero treinta años más tarde, durante el quinquenio de la Paz Armada con Chile (1894-99), la propia estrategia de guerra y la misma organización y línea de operaciones del ejército estuvieron puestas en tela de juicio.<sup>10044</sup>

Se cuestionaba su estrategia y organigrama, su distribución en armas, divisiones y unidades de combate, su cantidad y concentración en puntos geográficos determinados, su cadena de mando y la misma existencia de algunas instituciones que en otros tiempos habían cumplido roles protagónicos pero que amenazaban la unidad de mando.<sup>10045</sup> Circularon las reglas de combate en usanza en países de Europa.<sup>10046</sup> Se elaboraron programas y reglamentos para cada arma.<sup>10047</sup> Se confeccionaron los programas para la instrucción teórico-práctica del regimiento de ingenieros.<sup>10048</sup> Dichos programas fueron redactados para la instrucción de pontoneros, zapadores, ferro-carrileros y telegrafistas.<sup>10049</sup> Se proyectó la categoría de soldados apuntadores y arrieros.<sup>10050</sup> Se discutió si en los regimientos los jefes de batallones debían o no tener mando directo.<sup>10051</sup> Se debatió la necesidad de asignarse un reglamento para los servicios denominados: interno, de guarnición y de campaña.<sup>10052</sup> Y se cuestionó la existencia de la Junta Superior de Guerra y su superposición con las funciones que venía desempeñando el Estado Mayor General del Ejército.

En materia de estrategia militar a desplegar en las fronteras con los países limítrofes, se analizó su naturaleza como puente entre el poder militar y la política, su rol ofensivo o

defensivo, las estrategias de rodeo por los flancos (boquetes de la cordillera), y el poder de una iniciativa estratégica.<sup>10053</sup> La organización de una división de caballería se consideraba aún entonces de suma necesidad.<sup>10054</sup> También se discutía el proyecto de desplegar fuerzas de artillería en abanico a lo largo de toda la frontera con Chile. Para el redactor de *El Tiempo*, este proyecto era "...por una parte inoportuno; y por otra parte, impracticable en algunos puntos".<sup>10055</sup> Era impracticable, si se tenía en cuenta que, "...dado el estado de nuestra organización en general, las líneas militares actuales no están suficientemente cubiertas en su enorme extensión, es decir, que con once mil hombres que se pagan por el presupuesto, no hay fuerzas suficientes para dicho servicio".<sup>10056</sup> La distribución de las fuerzas "...tampoco es ventajosa, pues las baterías de artillería que se asignan a cada línea, representan una pura pérdida siendo más que sabido que ninguno debe estar mas concentrado que la artillería, porque el material y sus accesorios, no pueden conservarse sin buenos reparos; y porque, la instrucción teórico-práctica no puede darse suficientemente en ella, sino en el cuartel del regimiento respectivo, en los polígonos y en los campos de maniobra".<sup>10057</sup> ¿Cuál era el servicio de importancia que se podía exigir de la artillería en una situación pasiva como era la de hallarse acantonados en desiertos y montañas? Según el nuevo proyecto, "...se designa un número de cuerpos para cada línea militar, lo que haría desaparecer los núcleos de fuerzas que, para fines de instrucción, y de orden público, guarnecen las ciudades importantes".<sup>10058</sup>

En otras palabras, la Argentina no debía distribuir "...nuestro pequeño ejército de línea en forma de gran abanico sino, reconcentrarlo sobre varios puntos que se hallan a pocas jornadas de donde deben recibir las ordenes para reconcentrarse; donde puedan ir completando su organización, su instrucción, y fortificando su moral y disciplina".<sup>10059</sup> Se debía tomar en cuenta el tiempo que se emplea "...para estar en Bahía Blanca o en esta capital, las tropas de la guarnición que se asigna a la línea militar de Río Gallegos, las del Limay, las de los Andes, las del Bermejo".<sup>10060</sup> Se debía recordar que "...los caminos y los elementos de transporte no son adecuados para que tropas numerosas de las tres armas hagan grandes jornadas en corto tiempo; téngase en cuenta que las líneas telegráficas suelen estar interrumpidas hasta quince días en las actuales líneas militares y se comprenderá lo expuesto".<sup>10061</sup>

En cuanto a la diferenciación de responsabilidades y autoridad de mando, se entró a debatir en el Estado Mayor del Ejército, la disposición de su Jefe el General Alberto Capdevila, por la que daba el mando directo de los batallones a sus comandantes, en menoscabo de los jefes de regimiento.<sup>10062</sup> Esta disposición iba "...contra las ordenanzas, contra la táctica y contra el reglamento de disciplina que disponen que, un coronel es comandante superior del regimiento y los tenientes coroneles, jefes inmediatos de los batallones en que se divide".<sup>10063</sup>

Y con respecto a las instituciones que superponían funciones y amenazaban la necesaria unidad de mando, la Junta Superior de Guerra no tenía, para algunos, razón de existir en la forma que había sido creada.<sup>10064</sup> Sus atribuciones eran las de abocarse al estudio de todos los proyectos que tuvieran relación con la organización de las Fuerzas Armadas y que "...son las que corresponden, en gran parte, al estado mayor del ejército, y por consiguiente, una de las dos reparticiones está demás".<sup>10065</sup> Esta confrontación tenía su origen en la nueva diferenciación entre la jefatura del Estado Mayor General y el Ministerio de Guerra y Marina.<sup>10066</sup> La Junta pudo haber tenido que hacer "...cuando el Ministerio de la Guerra precisaba en que apoyarse para luchar con el estado mayor,

cuando el gobierno quería saber si era más duro el bronce que el aluminio, o si un sargento podría mandar a un soldado”.<sup>10067</sup>

Las Juntas de Guerra tenían en todos el mundo misiones distintas que la que tenía en nuestro país; eran, “...no las asesoras del Ministerio de la Guerra, sino las que aceptan e imponen la organización militar a un país”.<sup>10068</sup> Como tribunal para resolver litigios internos a la fuerza, la Junta Superior de Guerra se encontraba próxima a la acefalía y/o la anarquía. Con la indisposición que aquejaba al General Nicolás Levalle presidente de la Junta Superior de Guerra y la ausencia del general Francisco Reynolds, resultaba que este tribunal, “se encontraba sin número para sesionar”.<sup>10069</sup> Estando comprendido en la ley de retiros militares el general Bustillos, resultaba que “...dentro de pocos días a dicha Junta le faltará un miembro mas.”<sup>10070</sup> Y a comienzos de 1896, circulaba el rumor de que el ex Ministro de Guerra y notorio roquista general Nicolás Levalle, pensaba presentar su renuncia de presidente de la Junta Superior de Guerra.<sup>10071</sup> La causa de esta renuncia se explicaba, “...si se tiene en cuenta que la junta ha sido olvidada por la superioridad, hasta el punto de dejarla reducida a dos vocales, que no pueden hacer número, y al personal de secretario, que no tiene iniciativa”.<sup>10072</sup>

## **L-II.- Operaciones y modernización tecnológica importada como obstáculo para el desarrollo de una industria nacional.**

Como sosteníamos en el primer capítulo, a fines del siglo XIX la Argentina se embarcó tardíamente en un proceso cultural y político de modernización importada, que a la postre resultó frustrado y que se extendió a sus instituciones militares, tanto en su estrategia y organización como en su armamento. En ese sentido, la estrategia y el plan de operaciones vigentes eran en parte tributarios del tipo de armamentos implementados. Esta relevancia otorgada a la modernización del armamento llevaba también a una tacticización de la estrategia.

Con referencia a la adquisición de armamento, el editorialista de ***El Municipio*** manifestaba que su periódico estaba entre los primeros en “...no desconocer el peligro que entrañaba para el progreso del país la inversión de crecidas sumas en la compra de armamento”.<sup>10073</sup> Las naciones de América Latina habían de resultar más perjudicadas que cualesquier otra, “...con el mantenimiento de la paz armada, porque en vez de cañones y fusiles destinados, tal vez, a derramar sangre hermana, lo que aquí necesitamos son arados para fecundar las inmensas zonas de nuestro territorio”.<sup>10074</sup> En vez de máquinas destructoras, Argentina necesitaba “...máquinas para el trabajo, pero hay circunstancias ineludibles en la vida de los pueblos, que exigen sacrificios inmensos, y es menester someterse a ellas so pena de experimentar no solo perjuicios materiales sino también morales”.<sup>10075</sup>

Afin con esa ideología modernizadora, para poner en pié de guerra doscientos mil hombres, la Argentina necesitaba importar todo tipo de armamentos y pertrechos (de sanidad y comunicaciones), desde armas livianas como revólveres, fusiles, ametralladoras y machetes hasta armas pesadas, como cañones, obuses y torpedos. El fusil Mauser-Manlicher, último modelo, había sido adquirido en Berlín, a mediados de 1891, firmándose el contrato por cien mil unidades.<sup>10076</sup> Más luego se adquirieron ametralladoras, las que estaban destinadas a la artillería ligera, donde se las transportaba a lomo de caballo.<sup>10077</sup> Dicha importación procedía de distintos lugares de Europa, y

también de los Estados Unidos.<sup>10078</sup> En los viajes de compras, las diversas comisiones destacadas al efecto aprendieron como las autoridades militares en los países centrales estudiaban los modelos de armamentos y dictaminaban sobre los mismos.<sup>10079</sup> El periodismo local, para interiorizarse de esas millonarias adquisiciones hubo de familiarizarse con la prensa militar europea.<sup>10080</sup> La naturaleza del acero empleado en la fabricación de cañones era estudiado con mucho detenimiento.<sup>10081</sup> La calidad de cañones y morteros en cuanto a la rapidez de la puntería y la velocidad del tiro servía para determinar la constitución de las masas de artillería.<sup>10082</sup> Pero los proyectiles, por el nuevo mecanismo del rayado de las piezas, adquirieron forma cilindro-ojival revolucionando totalmente la artillería moderna.<sup>10083</sup>

El poder militar de un país no se mide solamente por la cantidad o poder de sus recursos bélicos, sino también por el número y la calidad de los accesorios indispensables que estos recursos requieran, como ser, "...puertos de refugio, talleres ya de máquinas como de fundición completos, para poder componer toda clase de averías, depósitos de combustible, de provisión de boca, y de guerra, donde se puedan construir con rapidez, chatas, grúas, buques, talleres, estanques de agua, hospitales, piezas de repuesto tanto de artillería como de máquinas, etc."<sup>10084</sup> Entre esos accesorios se encontraban todo tipo de recursos tales como puentes flotantes y torres blindadas giratorias para cubrir los boquetes de la Cordillera.<sup>10085</sup> Para esos propósitos, el Ministerio de Guerra y Marina se comprometió en la construcción de diversas infraestructuras militares con el objeto de almacenar el parque del ejército que se importaba de Europa.<sup>10086</sup>

Gran parte del armamento de guerra con el cual estaba nutrido el parque del ejército provenía como es notorio de las adquisiciones hechas por numerosas Comisiones destinadas al efecto en Europa.<sup>10087</sup> En materia de artillería, en Argentina se requería "...obedeciendo a principios elementales del arte militar, seiscientas piezas de **artillería**, o lo que es lo mismo, tres cañones por cada mil hombres".<sup>10088</sup> En la guerra chino-japonesa que se libraba en ese entonces --año de 1905-- se demostró que era la artillería de tiro rápido y/o curvo la que "...lleva hoy la supremacía en la guerra moderna y que su acción eficientísima está por sobre toda demostración después de la terminantísima prueba a que ha sido sometida en los combates librados en aquella campaña y en los que ha desempeñado un papel que excusa toda ponderación".<sup>10089</sup>

Pero la modernización del instrumental bélico no garantizaba su perpetuidad, pues la modificación del calibre de los cartuchos requería a su vez la transformación de las propias piezas de artillería. La transformación tal cual la planteaba el periodista de **La Nación**, beneficiaría las condiciones tácticas del material liviano y acrecentaría su poder balístico mediante el cambio de las actuales cureñas por otras más resistentes. Pero el redactor de **La Nación** no tenía en cuenta que si se pretendía practicar la transformación de las piezas de artillería para alcanzar las ventajas que ella supone, se tenían que transformar "...los arzones, carros de municiones, y cureña, quedándonos sólo utilizable del conjunto el tubo, o sea el cañón".<sup>10090</sup> **La Nación** se limitó entonces a brindar este consejo: "Mientras tanto podrían modificarse para cartucho metálico las noventa piezas Krupp, livianas, calibre 7.5, haciendo trabajar en algo de provecho los talleres mecánicos del Arsenal. La operación, según cálculos del ingeniero Costa Arguibel no demandaría mayor gasto de 50.000 ps."<sup>10091</sup>

La transformación de las noventa piezas de artillería a cartucho metálico ¿podrá ejecutarse aquí o tendríamos que recurrir a las fábricas europeas? El periodista de **El**

**Tiempo** creía que “...tendríamos que recurrir al viejo mundo, pues si bien nuestra susceptibilidad nacional nos inclinaría a desear la capacidad necesaria a nuestros arsenales para estos trabajos, la convicción profunda que nos acompaña de su verdadero estado nos obliga a pensar aquello”.<sup>10092</sup> Para la transformación de las piezas de artillería el señor Krupp sostenía en 1892 que se debía exigir “...al erario argentino 416 pesos oro por pieza (refiriéndose simplemente a la cuña) sin contar gastos de transporte, etc. ¿Cuánto nos costaría hoy? Suponiendo que dos mil pesos cada una, necesitaríamos una cantidad no menos de ciento ochenta mil pesos para la transformación que se pretende”.<sup>10093</sup> Como la transformación de las piezas impondría “...la de las cureñas, carros, y armones, que se ejecutarían en el país, ¿cuánto importarían en buena moneda esos trabajos? Confesamos ingenuamente que no lo sabemos a ciencia cierta, pero creemos que no bajaría la cantidad de trescientos mil pesos oro”.<sup>10094</sup>

Pero no era sólo en el sacrificio pecuniario que según **El Tiempo** se debía parar atención, sino en las consecuencias de una transformación técnica inmediata. Se imponía calcular que se necesitaban también armones y carros de doble capacidad y triple resistencia “...y es difícil solucionar la dificultad que se presentaría en la movilidad; y si para facilitar esta, se disminuyese la capacidad, sería disminuir la provisión, o, lo que es lo mismo, neutralizar la ventaja obtenida por la disminución en el número de cartuchos”.<sup>10095</sup> Estas piezas (proyectiles con espoleta de doble efecto) podían muy cómodamente transformarse “...y aumentarse su velocidad inicial hasta 500 metros más o menos, pues sus cureñas pueden soportar cómodamente el aumento de resistencia exigido por el acrecimiento del resultado balístico”.<sup>10096</sup> Pero lo que no pueden soportar, “...es colocarles frenos de tiro automáticos a dichas cureñas”.<sup>10097</sup> Si el periódico **La Nación**, en vez de aconsejar la transformación para simple cartucho metálico la hubiera aconsejado para tiro rápido y/o curvo, “...aunque cometiendo error, la hallaríamos más cerca de la verdad y más posesionada de la difícilísima cuestión que se avocaba, pues está en la conciencia de los entendidos que esta última clase de material es la que se impone hoy y la que llena cumplidamente las necesidades de la época; pero a nuestro distinguido colega no se le ocurrió esto por una sencillísima razón: porque ni sospechó siquiera que eso fuera lo oportuno, lo práctico y lo sensato”.<sup>10098</sup>

En suma, la adquisición de material bélico en Europa suponía también tener que modernizar periódicamente el número y la calidad de sus accesorios, modificar el calibre de los cartuchos y transformar las piezas de artillería, y las cureñas, armones, y carros de municiones.

#### L-II-a.- Secuelas de la adquisición del material de guerra en Europa.

La adquisición del material de guerra en Europa daba ocasión a toda suerte de reyertas, acusaciones y competitividades.<sup>10099</sup> En Buenos Aires, el periódico **Le Courier Français** publicó en febrero de 1895 un comunicado firmado C.D., en que se hacían graves cargos contra el Teniente Coronel Sellstrom a quien se acusaba de ser agente asalariado de la fábrica de cañones Krupp, “...no obstante de formar parte de la comisión que formula los pedidos de material de artillería”.<sup>10100</sup> El comunicado manifestaba que ya anteriormente había denunciado ese hecho, “...que hasta ahora no ha sido desmentido”.<sup>10101</sup> Después agregaba, “Que extraño que las compras de material de artillería no se hagan por concurso, ni que la comisión vacile tanto; No es sorprendente que se obtengan tampoco resultados deplorables en las pruebas de la

cabaña Laura”.<sup>10102</sup> Se delataba también en ese comunicado el hecho de que el Sr. Sellstrom, hablando en su conferencia del fabricante de cañones inglés Vayasseur, le haya llamado “el estúpido Vayasseur”, con la intención de desacreditar toda fábrica que no sea la de Krupp.<sup>10103</sup> Concluía el Sr. C.D. diciendo “...que es tiempo que el Ministro de la Guerra tome en cuenta lo que sucede, y haga que el Teniente Coronel Sellstrom elija entre el puesto de oficial del ejército argentino y el de agente asalariado de una fábrica extranjera”.<sup>10104</sup>

Mientras aún estaba vivo el recuerdo de las graves denuncias hechas públicas en las postrimerías de la administración del Coronel Balsa (Solier-Bosch), a propósito de las irregularidades cometidas en la adquisición del armamento, *El Municipio* informaba que llegaban rumores “...de haberse descubierto nuevos abusos que, según se afirma, acaban de ser puestos en conocimiento del ministro de la guerra por medio de una nota del Coronel Obligado, presidente actual de la Comisión de Artillería que hallase en Europa.”<sup>10105</sup> En dicha notas, se exponían todas las irregularidades encontradas en los procedimientos empleados en la compra del material Krupp, “...llegándose hasta consignar las conferencias privadas que se celebraron con el agente comercial de la fábrica y mediante los cuales ha sido posible enviar a la república material poco menos que inservible, a pesar de haberlo pagado la nación a peso de oro”.<sup>10106</sup>

En efecto, mientras todos abrigaban la creencia de que nuestro material bélico “...nos colocaba en condiciones de superioridad con respecto a los demás estados sudamericanos”, resultaba ahora “...que quizá ocupemos un lugar muy secundario, puesto que los cañones que nos han enviado no tienen el poder que establece el contrato y las municiones no producen los efectos y no tienen el alcance que teníamos el derecho de esperar dado las elevadas sumas que se han invertido en ellas”.<sup>10107</sup>

Pero lo que más causaba indignación y pena, era el grado de inmoralidad al que se había llegado. Era verdad que esto no podía causar extrañeza, “...desde que nada que fuera de provechosos resultados para el país podía esperarse de algunas de las Comisiones que se enviaron a Europa para adquirir armamento, desde que al mandar esos delegados no se ha tenido para nada en cuenta la competencia, la actividad y la honradez, sino pura y simplemente, el más descarado favoritismo que viene imperando en las esferas oficiales desde hace veinte años”.<sup>10108</sup> Y precisamente, debido a ese favoritismo es que “...se quedaban impunes irregularidades de la naturaleza de las que motivan estas líneas, resultando de ello que algunos de los nuevos comisionados se consideraron con derecho a usar los mismos procedimientos, esto es, a dejarse dominar por el imperio de la coima, engañando inicuaamente al país para favorecer a los fabricantes, quienes llegaron hasta el extremo de enviarnos armamento y proyectiles ya rehusados, por inservibles, por otras naciones”.<sup>10109</sup>

En el sentido apuntado por las denuncias, el desempeño tanto de la Fábrica Nacional de Pólvora como del Arsenal de Guerra era crucial a los efectos de una contienda bélica. En un principio, ambos organismos se encontraban separados, en jurisdicciones distintas, fusionándose recién en 1898, cuando se establecieron los arsenales regionales.<sup>10110</sup> En cuanto a la Fábrica Nacional de Pólvora, el estado de abandono en que se encontraba era sumamente sensible, “...a causa de la ninguna atención que el gobierno presta a todo lo relacionado con ella”.<sup>10111</sup> A tal extremo era el abandono, que estuvo a punto de ser cedida a una empresa particular, de capitales foráneos.<sup>10112</sup> Para el redactor de *El Tiempo*, resultan inútiles “...los grandes esfuerzos que su director y

todos los empleados hacen para organizarla y ponerla en condiciones de llenar los servicios que de ella se espera. Inútil es que se reiteren al ministerio los pedidos de instrumentos o artículos de imprescindible necesidad, pues aún los de materiales precisos para refacciones urgentes no se satisfacen con la puntualidad debida”.<sup>10113</sup> Por el contrario, en la carpeta del Ministro los expedientes duermen meses y meses, “...resultando que cuando son proveídos, el número de refacciones necesarias ha aumentado y los materiales entregados son insuficientes, quedando todo en el mismo estado de antes”.<sup>10114</sup> En agosto del 94, se solicitaron “...maderas, pizarras, etc. Para el arreglo del techo y piso de un polvorín, cuyo mal estado hacía temer la descomposición y pérdida de la pólvora en él depositada, a pesar de haber sido ese pedido reiterado y con carácter urgente, nada se ha resuelto hasta la fecha”.<sup>10115</sup> Sucede lo mismo “...con tres calderas, inutilizadas desde que el Sr. Carulla se encontraba al frente de aquel establecimiento y las que exigirían muy poco gasto para su refacción”.<sup>10116</sup>

A los efectos del Arsenal de Guerra, la prensa diaria informaba de la gran cantidad de pertrechos bélicos que ahí se manufacturaban, entre atalajes y carros de municiones.<sup>10117</sup> En cuanto al control que de los mismos se practicaba, por ahora “...no haremos mención de lo que informó la comisión de contadores respecto de cómo se controlaba en el Arsenal la entrada e inversión de los materiales, de lo que pasó al General Wintter en la última revolución, que tuvo que fabricar atalajes de cuero fresco para su artillería en San Nicolás; de lo que denunció el Sr. Seeber en un escrito publicado en *El Diario*, en que salió a relucir hasta la falta de limpieza que se notaba en los diversos departamentos del Arsenal y de mil denuncias, más o menos veladas, que han visto la luz pública en diversos órganos del periodismo.”<sup>10118</sup> El periódico *El Tiempo* venía informando sobre accidentes ocurridos en dicho organismo, y manifestaba que en esta ocasión se iba a reducir a indicar “...lo que nos consta se ha ejecutado en el Arsenal con conocimiento pleno y bajo la responsabilidad de su ex director”.<sup>10119</sup> Entre muchos otros objetos suntuarios, “...se fundió el busto en bronce del señor General Garmendia, por el que abonó una cantidad que no cubría el sueldo que abonaba la nación al artífice durante el tiempo empleado en ese trabajo. Se fundió en bronce el busto de una de las distinguidas hijas del general Luis M. Campos, siendo éste Ministro de la Guerra. Como la obra artística fuera mala, el busto fue al horno. Se fundió en bronce el busto del coronel Penna, segundo jefe del arsenal, que adorna la sala de su casa. Se fabricaron ruedas para el carruaje particular del general Garmendia y cochecitos para sus hijos. Se han compuesto y labrado en oro y plata armas antiguas de toda clase para la panoplia particular del señor general. Podemos indicarlás una a una, fecha por fecha, y los nombres de los operarios empleados en estos trabajos”.<sup>10120</sup>

En cuanto a las invenciones, algunas fueron de gran trascendencia para la industria bélica.<sup>10121</sup> Pero no todas las invenciones eran importadas.<sup>10122</sup> Muchas de las mismas fueron de origen vernáculo --ideadas en un medio cultural y mediático que promovía las innovaciones técnicas y científicas-- desde torpedos hasta puentes flotantes, escaleras de tiro, carros municioneros, cajas de monos, atalajes y palas zapa-pico.<sup>10123</sup> Un diario del Callao decía que el joven S. Fuller --peruano residente en Iquique (Chile)-- “...solicitará en breve al gobierno de su país el privilegio para una ametralladora que ha inventado”.<sup>10124</sup> Esta máquina de guerra era de “...una precisión y de un mecanismo que no tienen rival, como que en cualquier caso y sin estar expuesta a entorpecimientos, podrá disparar hasta mil seiscientos tiros por minuto, según Fuller”.<sup>10125</sup>

Por otro lado, en la dársena de Buenos Aires, el señor Eloy Vergniere continuaba los ensayos con un aparato submarino de su invención, con mejor resultado que los anteriores, "...en los cuales pudo comprobar que debía robustecer más las chapas del mecanismo para evitar los efectos de la presión de las aguas".<sup>10126</sup> El sencillo ingenio contenía en su interior, herméticamente cerrado, "...cerca de dos metros cúbicos de aire, que el operador encerrado dentro de él expulsa por medio de una válvula a medida que se va viciando, y lo renueva artificialmente con bastante prontitud".<sup>10127</sup> Existían además "...tres ventanitas, por las cuales se puede ver al hombre fumando tranquilamente, y con una, dos y más velas encendidas".<sup>10128</sup> Su autor intentaba aplicar el aparato en la instalación de minas submarinas, y su destrucción, si fuere necesario, salvatajes y otros usos del género.<sup>10129</sup>

Las fallas en el armamento adquirido en Europa alcanzaron en determinadas épocas escándalos inauditos. En 1893, siendo jefe del Estado Mayor de la armada el comodoro Rafael Blanco, recibió oficio reservado y confidencial del comandante del crucero 25 de Mayo denunciando los defectos de proyectiles puestos de manifiesto en la nota aludida. La denuncia fue inmediatamente atendida con la discreción del caso, ordenándose conducir la munición clasificada de mala al arsenal de Zárate, donde más tarde pudo examinarla el jefe de la dirección de artillería señor Maurette.<sup>10130</sup> Diez años más tarde, en 1903, con motivo de las fallas encontradas en el material de guerra adquirido en ese año, se desataron denuncias periodísticas, que dispararon una interpelación parlamentaria. En efecto, el Gobierno del Gral. Roca (1903), siguiendo una práctica inveterada, en vez de reunir a los jefes y oficiales mas competentes en artillería, para someter a su examen la cuestión, confió la reparación del entuerto, al criterio discrecional del Ministro Pablo Riccheri, que, "...conservando los cargos de director de arsenales y jefe del Estado Mayor General, fue a Europa como presidente de la Comisión de Armamentos".<sup>10131</sup>

El Estado Mayor había quedado "...acéfalo en los momentos más críticos en que la organización del ejercito era urgentemente reclamada por la inminencia del peligro; pero el Congreso no se apercibió de este curioso contraste, votó millones y, sin instrucciones ni un plan preconcebido de las adquisiciones a realizar, ni de las modificaciones a introducir en el nuevo material, se dio carta blanca al entonces jefe de estado mayor, se le entrego por así decirlo, los destinos de la patria".<sup>10132</sup>

Transcurrido un lustro, desde que se iniciaron dichas adquisiciones, el Congreso no había recibido "...la rendición de cuentas: nadie sabe a ciencia cierta (fuera del estrecho círculo del Presidente), el empleo hecho de los millones, ni en que ha quedado la leyenda de la transformación de cañones en rieles".<sup>10133</sup> El ejército, los artilleros del país no tenían "...el mas mínimo conocimiento de la característica del nuevo material, ni las decantadas reformas introducidas, y sin los festejos internacionales, sin la manía exhibicionista, sin la exigencia de la célebre revista, seguramente los cañones hubieran continuado muy bien guardados en los depósitos del arsenal central".<sup>10134</sup>

Los oficiales de artillería ansiosos de conocer el nuevo material de artillería y sin más datos "...que los de la tabla de tiro, tiraron algunos tiros con un resultado tan desastroso que no hay palabra suficientes para condenarlo".<sup>10135</sup> Al tercer disparo, los seis cañones de la misma batería, "...quedaron fuera de combate. En algunos, el cierre-tornillo, como incrustado en la culata del cañón, no podía ser extraído de su alojamiento, en otros, después de grandes esfuerzos se conseguía abrir, pero era imposible cerrar porque el

tubo interior se había dilatado posteriormente a mas de medio milímetro. Total, las piezas inutilizadas completamente al 3º, 4º o 6º disparo, y lo que todavía es mas grave, muchas solamente bajo la acción del cartucho a fogueo”.<sup>10136</sup> Como es natural, se “...suspendió inmediatamente el tiro, se dio cuenta del hecho, algún miembro de la comisión, dio explicaciones de circunstancias...se mandaron los cañones inválidos al hospital del arsenal central y cuando la noticia llego al Ministerio, se dio la voz de alarma, se recogió todo el material, se guardo la mas absoluta reserva y con todo sigilo y misterio se procedió a la amputación del metal que estorbaba el funcionamiento del cierre”.<sup>10137</sup> Con motivo de las denuncias de *La Prensa*, el Diputado Alberto Capdevila recoge las incriminaciones e interpela al Ministro de Guerra Gral. Riccheri. El Ministro se ve obligado a levantar las acusaciones, para finalmente desestimarse las mismas. Era la segunda vez que el Gral. Capdevila interpelaba al Ministro Riccheri, habiendo sido la anterior referida al proyecto del Servicio Militar Obligatorio. Dos años más tarde, habiendo fallecido su mujer, derrotado en la Cámara de Diputados en dos debates centrales a su pensamiento, y ya no encontrando sentido a su vida, el Gral Capdevila se suicida.<sup>10138</sup>

En suma, los mecanismos de adquisición del armamento importado, el desempeño de la Fábrica Nacional de Pólvora y del Arsenal de Guerra, las invenciones de material bélico, y las fallas en el armamento adquirido en Europa revelaron la profunda contaminación moral que padecían las estructuras del estado..

#### **L-II-b.- La guerra europea y la industria militar nacional.**

La modernización armamentística, enteramente dependiente, hacía que cada vez que existían guerras o amenazas de guerra entre los propios países europeos, el abastecimiento de armamento o de repuestos de armamentos peligraba en forma acuciante.<sup>10139</sup> Desatada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), dejaron de importarse armamentos, y los arsenales del ejército y la armada debieron de arreglárselas por sí solos. La antigua fábrica de pólvora de Río Cuarto se convirtió en el Arsenal del Centro y se instalaron otros tres arsenales regionales: el del Litoral (Rosario), el del Norte (Tucumán), y el de Río Negro (Colonia Roca). El 25 de octubre de 1916 el Teniente Coronel Isidro Arroyo, secundando al General Luis Dellepiane al frente de la Dirección General de Ingenieros, continuando la obra de los generales Angel Allaria (12-28-A) y Emilio Ledesma (16-2-A), había fabricado material de su arma en el país, en talleres por él contruidos y sin erogaciones para el Estado (pontones, carros de telegrafistas, zapadores, etc.), y fue luego nombrado Director General del Material, que luego se denominó Director General de Arsenales, puesto que ocupó seis largos años, hasta 1922.<sup>10140</sup> Sobre la base de esta institución, el primer gobierno de Yrigoyen inició planes de sustitución de importaciones de elementos de guerra.<sup>10141</sup>

Arroyo, que había sido postergado en la carrera debido a su filiación como revolucionario Radical, transformó el Arsenal San Lorenzo (antes Litoral), haciendo de él uno, conjuntamente con “...con los mas grandes talleres del país, en Córdoba (antigua fábrica de pólvora negra, casi en ruinas, hoy Arsenal José María Rojas) y rehice, quintuplicándolo, el Arsenal Principal de esta ciudad, hoy Estéban de Luca, modernizándolo completamente”.<sup>10142</sup> Arroyo fundó el Establecimiento Siderúrgico de Andalgalá (Catamarca), dependiente de la entonces Dirección de Arsenales del

Ministerio de Guerra, y fue el primero y único en el país “...que ha explotado minas de hierro, elevado un alto horno y producido lingotes”.<sup>10143</sup>

A más de la fabricación con metal propio de caños de fusil y hojas de sable; Arroyo fabricó “...dos cierres para cañón de campaña para reemplazar igual número que fueron destruidos en un ejercicio de fuego; la adaptación de la falsa ojiva al proyectil del cañón de campaña que dio a este un alcance de once kilómetros plenamente comprobado en las repetidas experiencias que se hicieron”.<sup>10144</sup> Posteriormente, los Generales Manuel Savio y Enrique Mosconi culminaron la labor que tan modestamente había iniciado Arroyo. Savio planificó, secundado por el Capitán Ricardo Marambio, la movilización industrial y fundó la Escuela Superior Técnica, donde se forman los ingenieros militares.<sup>10145</sup>

### **L-III.- Logística para el abastecimiento, movilidad y concentración de tropas**

La logística de todo ejército es necesariamente tributaria de las estrategias y tácticas operacionales diseñadas, donde la localización, movilidad y concentración de sus mandos y unidades son de una relevancia clave. Correspondientemente, la movilidad y/o rotación de los mandos y de las unidades militares estuvo también en relación directa con la logística, ya sea la de las vituallas, la sanidad, la remonta, el vestuario, la vivienda, o las comunicaciones.<sup>10146</sup>

Cada una de estas logísticas tuvo siempre su actor institucionalizado. Sanidad Militar estaba a cargo de la logística sanitaria; Remonta de la provisión de ganado caballar y mular; la Comisaría General de Guerra del alojamiento u hospedaje, la Intendencia de Guerra del aprovisionamiento de vituallas, combustibles (leña, carbón) y prendas del vestuario; y el Estado Mayor de los vínculos con la Dirección General de Ferrocarriles, en todo lo referente al transporte de tropas y pertrechos de guerra; y con la Administración de Correos y Telégrafos en todo lo concerniente a las comunicaciones telegráficas.<sup>10147</sup>

#### **L-III-a.- Logística de las vituallas, la sanidad y el vestuario.**

La logística sanitaria tenía relación directa con el aprovisionamiento de medicamentos, ambulancias, botiquines, y carros de cirugía, y en tiempos de epidemia hasta de la leña o el carbón con la cual se cocía el agua.<sup>10148</sup> La logística de las vituallas se refiere al aprovisionamiento de víveres y provisiones.<sup>10149</sup> En un principio, dicho aprovisionamiento era brindado mediante contrata a través de las denominadas Proveedurías, y luego fue ofrecido por administración.<sup>10150</sup> La logística de la indumentaria y de los aperos tenía que ver con la provisión de uniformes, capas, ponchos, calzado, caramañolas, monturas, etc.<sup>10151</sup> En el ejército había toda suerte de indumentarias, pero lo que menos había era uniformidad en el vestir, con todo el significado simbólico que ello implicaba.<sup>10152</sup> Hasta el diseño del kepi, en especial la forma de la visera, variaba según las armas.<sup>10153</sup> Y lo que pasaba con el kepi pasaba con todo el resto del uniforme, resultando un “...desorden tan abundante y antojadizo en el vestir, que cuando se ve un grupo de jefes u oficiales no se sabe si se trata de individuos de distintos ejércitos o de una mascarada de carnaval”.<sup>10154</sup>

Hubo entonces una necesidad impostergable de homogeneizar el tipo de uniforme reglamentándolo.<sup>10155</sup> Pero las diferencias en las insignias y el color elegido para el traje subsistieron.<sup>10156</sup> Asimismo, produjo asombro la supresión de la capa y la implantación de hombreras entre los oficiales.<sup>10157</sup> Por cierto, la tropa y las clases también se destacaban por la promiscuidad del vestir.<sup>10158</sup> Ni hablar de los integrantes de las bandas de música.<sup>10159</sup> Pero con la reglamentación los más golpeados en materia de vestuario fueron los soldados.<sup>10160</sup> Por último, el momento y el lugar de la provisión del uniforme a los soldados enganchados generó toda una discusión que se tuvo que laudar a favor de las unidades de destino.<sup>10161</sup>

La provisión de uniformes era lo que más urgentemente se necesitaba. Cualquiera que apenas conociera los pormenores de la instrucción militar sabría, "...que la uniformidad del traje en los soldados de un batallón o compañía, ayuda inmensamente al rápido enseñamiento de los reclutas: las razones de carácter exterior, y también las psicológicas que pesan en el ánimo del soldado, para hacerle obediente y darle entusiasmo cuando viste con los mimos colores que sus compañeros de filas, son demasiado conocidas para que las enumeremos ahora".<sup>10162</sup> Las razones psicológicas existían, y estaba comprobado que "...hasta los soldados veteranos, pierden mucho en su disciplina y espíritu marcial cuando no se hallan uniformados".<sup>10163</sup>

En materia de aperos, se instituyeron comisiones encargadas de determinar los más convenientes en materia de peso y calidad.<sup>10164</sup> El peso del equipo era vital tanto para la resistencia del soldado como para la del equino que montaba.<sup>10165</sup> Para determinar esa resistencia se debían ejecutar ensayos con la caballada de rigor.<sup>10166</sup> Asimismo, se debieron establecer los requisitos de los concursos para determinar los modelos a elegir.<sup>10167</sup> Y con referencia a la provisión de la caballada, a diferencia de los países europeos, aquí estaba librada a la improvisación más absoluta.<sup>10168</sup> A pesar de que la responsabilidad le cabía al Depósito de Remonta, años después denominada Inspección General de Remonta, en caso de extrema necesidad los jefes de unidad expropiaban las caballadas a los hacendados vecinos, mediante recibos o vales.<sup>10169</sup> También se llegó a discutir la utilización de ganado canino y de palomas en las comunicaciones.<sup>10170</sup>

En otras palabras, se observa una tendencia sostenida dirigida a homogeneizar la indumentaria y a aligerar el peso de los pertrechos bélicos. Todas estas medidas estaban diseñadas a imagen y semejanza de los países centrales, en cuyo espejo se observaban los ejércitos de la periferia mundial.

### **L-III-b.- Logística comunicacional y del transporte**

En cuanto a la logística del transporte, la revolución comunicacional (ferrocarriles y telégrafos, acorazados) transformó radicalmente el movimiento de tropas y unidades militares, con la consiguiente repercusión en la diagramación de las mismas estrategias.<sup>10171</sup> El espacio, al decir de Moltke, había sido conquistado por el tiempo.<sup>10172</sup> Ello llevó al predicamento de una noción tecnocéntrica de la guerra. Antes de prevalecer la comunicación ferroviaria, los mandos militares solían perpetuarse en las unidades asignadas. Pero después de la revolución tecno-comunicacional que significó la locomotora y el cabotaje a vapor, la movilidad de la tropa cambió radicalmente y el tiempo de permanencia o residencia de las respectivas unidades

disminuyó notoriamente.<sup>10173</sup> Si bien no en materia marítima, en cuanto a movilidad ferroviaria, Argentina contaba con una clara superioridad sobre Chile.

Pero el secreto de una sabia logística residía no sólo en el conocimiento puntual de las necesidades de cada unidad militar para residir y movilizarse en el tiempo y en el espacio. No bastaba que hubiere ferrocarriles, locomotoras, vagones y naves; era “...necesario saber prácticamente, cuantos vehículos necesita un batallón de infantería, para ser trasladado a mil kilómetros del punto de partida”.<sup>10174</sup> Cuanto mayor era la distancia, mayor cantidad de vagones y locomotoras necesitaba ese mismo batallón. Mil kilómetros de viaje en tiempo de guerra obligaba a llevar víveres, botiquines, carpas, caballos y demás elementos que necesitaba un batallón en campaña.<sup>10175</sup>

La logística comunicacional debía también tomar en consideración la conversión de los recursos entre las diferentes cualidades y modalidades de los mismos. En materia ferroviaria lo que debía estudiarse era la cantidad y calidad de los trasbordos. En Argentina se contaba con tres trochas diferentes. La mayor parte de los ferrocarriles de la provincia de Santa Fé, “...algunos de los cuales llega hasta Tucumán —el Central Norte que desde Córdoba va a hasta Jujuy— es trocha de un metro; los de Entre Ríos y Corrientes son de 1, 43 y los del resto de la república de 1,66. Para transportes de tropas del norte al centro de la república se pueden emplear vagones de trocha de 1m y de 1,66”.<sup>10176</sup>

También se debía tener en cuenta los insumos auxiliares de cada uno de los medios de locomoción y de transporte. Los ferrocarriles del norte y oeste cruzan territorios donde el agua es escasa, que apenas alcanza para el servicio ordinario. Un aumento de trenes agotaría los estanques o los pozos y “...el movimiento tendría que paralizarse porque las locomotoras no tendrían donde proveerse del agua”.<sup>10177</sup> Hay locomotoras que consumen leña y otras carbón. Si de ambos combustibles no hay provisión y depósitos en puntos convenientes, “...se corre el riesgo de que los trenes se vieran detenidos porque no habría con que levantar vapor”.<sup>10178</sup>

La existencia en las estaciones terminales e intermedias de planchadas para la descarga y desembarco de los recursos bélicos incluidas las caballadas así como de galpones para su almacenamiento eran vitales.<sup>10179</sup> En cuanto a los recursos ferroviarios, durante la Revolución de 1905 en Mendoza, el General Ignacio Fotheringham contaba que los Administradores del Ferrocarril Andino y del Gran Oeste, en lo que se refiere a la descarga de piezas y clase de tropa para la represión, “...han desplegado toda actividad y prestado su más decidido apoyo a la más rápida marcha. Los Jefes de Estación todos, los más atentos y por cierto que son acreedores a un mayor reconocimiento”.<sup>10180</sup> A pesar de llevar buenos tablones, el general Fotheringham confiesa que “...es lerdio y difícil el desembarque de piezas y caballos en las Estaciones donde no hay facilidades para esa operación: y creo que en toda Estación de la República debería haber planchadas o planchadas a propósito. Se podría entonces, hacer en una hora, lo que actualmente requiere tres o aun cuatro y el tiempo a veces es factor muy principal de éxito”.<sup>10181</sup>

En el transporte ferroviario se deben tomar en consideración el estado de la infraestructura vial. No debe olvidarse que ciertas locomotoras, por su gran peso, consecuencia de su potencia, era peligroso que recorrieran vías construidas para locomotoras más livianas. Este olvido habría dado lugar a desastres que debían

evitarse.<sup>10182</sup> Para el caso, los durmientes y los rieles del Andino “...se encuentran en condiciones pésimas y los descarrilamientos se producirían al menor descuido”.<sup>10183</sup>

La movilización de grandes unidades requiere también el cálculo del tiempo y los recursos telegráficos necesarios “...para colocar el material rodante en cada punto geográfico de un determinado plan de marcha, sin que den lugar a equívocos o fraudes”.<sup>10184</sup> Los vagones como las locomotoras, se encuentran “...diseminados en los 14 o 15.000 kilómetros de nuestra red ferrocarrilera y es conveniente conocer aproximadamente el tiempo que la concentración de ese tren rodante en puntos estratégicos exigiría”.<sup>10185</sup>

La localización de los puntos de trasbordo son claves para analizar la distribución del material rodante. Suponiendo que la concentración de tropas se hiciera en Río IV o Villa Mercedes (San Luis), gran parte de las del norte tendrían que venir hasta el Rosario para de allí seguir hasta Villa María, que es de donde arranca el ferrocarril Nacional Andino.<sup>10186</sup> De la Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, y Santiago, vendrían a Córdoba por el Central Norte y allí hay que efectuar el trasbordo, porque el Central Argentino es de trocha ancha. Resultaría así que en Villa María se aglomerarían dos o tres mil vagones y esa estación carece de desvíos para recibirlos.<sup>10187</sup>

Para la materialización de esos trasbordos se debía también estudiar “...la existencia en las estaciones intermedias de los desvíos necesarios. Se dirá que a medida que llegaran los trenes con tropas se les despacharía para Río IV, pero aquí se presentaría un gran inconveniente. Ni la estación de Río IV ni las estaciones intermedias “...cuentan con desvíos suficientes para recibir los trenes de retorno, que no debe olvidarse que por aquel barrio no hay doble vía”.<sup>10188</sup> Y con la provisión de “...diez o quince trenes tendríamos interrumpida la circulación”.<sup>10189</sup>

En conclusión, una logística comunicacional que se preciara a sí mismo debía contemplar la conversión de los recursos (material rodante), los cálculos de tiempo en los aprovisionamientos, la provisión de los insumos auxiliares (agua y combustibles), el estado de la infraestructura vial, el material rodante y las líneas telegráficas, y la localización y planificación de las estaciones de trasbordo, de las intermedias y las terminales

### **L-III-c.- Infraestructura edilicia del ejército**

En cuanto a la infraestructura edilicia del ejército, otrora responsabilidad de la Comisaría General de Guerra, y luego de una brigada o jefatura del Estado Mayor General, una profunda preocupación derivada de la importancia otorgada a los factores morales en la guerra estribaba en la discriminación del tipo de acantonamiento, que en los destinos del interior del país se tornaban humillantes.<sup>10190</sup> Por los alojamientos que tenía el soldado en esta capital, “...en sus cuarteles de lance, y por el que ofrece el único cuartel construido especialmente en Maldonado, se puede apreciar lo que será la vida del soldado en los acuartelamientos de provincias, en los campamentos con carácter permanente como el de Mercedes, y en esos purgatorios de infelices inocentes de Choele-Choel o de las Lajas”.<sup>10191</sup>

Medio millón de los seis millones de pesos empleados en la adquisición de cañones, obuses, máquinas y demás elementos de defensa, "...hubieran bastado para levantar en un campo cualquiera, de condiciones salubres, los ranchos de fierro y paja —si no había para mas— donde se habrían alojado 15 o 20.000 hombres, todo el ejército, en fin, concentrado en un punto determinado desde el cual, gracias a la rápida comunicación de los ferrocarriles, habrían sido enviados al punto donde su presencia fuese reclamada".<sup>10192</sup> Poseer el más espléndido arsenal de la tierra, "...con soldados debilitados por una vida anti-higiénica, por el hacinamiento en locales insalubres que barbarizan al soldado, y transforman al oficial en guardián de galeras, es como viajar por el desierto cargado de oro y expuesto a perecer de hambre".<sup>10193</sup>

El estado físico de los edificios era un toque de alarma, pues en varios casos habían culminado en derrumbes y desaguisados de toda índole.<sup>10194</sup> En la calle Azcuénaga, en Río IV, en Santa Catalina, provincia de Buenos Aires, y en Santo Tomé, Corrientes, se derrumbaron en distintos momentos sendos edificios destinados para cuadra de la tropa, con su secuela de muertos y heridos.<sup>10195</sup> Las compañías y batallones afectados debieron mudarse a Palermo por carencia de edificios en Santa Catalina.<sup>10196</sup> Cuando ocurrió el derrumbe en los cuarteles de Santo Tomé, Corrientes, el regimiento fue trasladado a Paraná.<sup>10197</sup>

Los edificios del campamento eran viejos y se hallaban en pésimas condiciones.<sup>10198</sup> En la prensa de la época se hacía una rápida descripción del único edificio levantado con objetivo puramente militar: el cuartel de Maldonado.<sup>10199</sup> Por las características del mismo se podía "...deducir lo que serán los demás, corralones, barracas alquiladas en momentos de apuro, u otras refaccionadas como el del Parque o el de Palermo, verdaderas pocilgas donde se amontonan miles de soldados, cuando apenas tienen capacidad suficiente para dos o trescientos".<sup>10200</sup> Ese involuntario como forzoso hacinamiento "...de multitud de individuos, sin el agua ni los desagües suficientes para una higiene indumentaria, es además de un peligro para los soldados, un peligro aún mayor para los barrios donde están ubicados".<sup>10201</sup> En muchos de esos cuarteles, "...son endémicas las enfermedades como la gastro-enteritis, la fiebre tifoidea, y tal vez, con un examen más prolijo, se enriquecería la patología, aumentando la lista de las enfermedades, con alguna fiebre palúdica especial producida por los medios en que se desenvuelve la vida de nuestros soldados".<sup>10202</sup>

Amén de la logística, era urgente entonces "...construir alojamientos para las tropas; dar caballos y mulas a los regimientos; aumentar el efectivo de los cuerpos; instruir la milicia ciudadana; simplificar la sanidad y los servicios administrativos; cambiar armamentos e instalar con pericia y estrategia los campamentos".<sup>10203</sup>

Es así que, a partir de 1896, comienza una campaña de edificación de numerosos cuarteles.<sup>10204</sup> El Ministro de la Guerra conferenció con el Presidente de la República "...a propósito del cuartel de artillería que se construye en Liniers".<sup>10205</sup> El gran patio central "...tiene 66 metros de ancho por 300 de largo, parte minúsculo del terreno utilizado que alcanza a 34 hectáreas. Las obras se prosiguen con toda actividad habiendo prometido el presidente visitarlas en la presente semana".<sup>10206</sup> Como el camino que conduce de la estación Liniers al cuartel, "...600 metros mas o menos, es bastante malo, sobre todo después de las lluvias, se tenderá un ramal férreo que ponga en comunicación los dos edificios".<sup>10207</sup> El costo total del cuartel "...será de 460.000 pesos moneda nacional.....con el sobrante lo mismo que con las partidas de \$200.000 para

construcción y refacción de cuarteles, se dedicará a hacer esto último, para lo cual tiene ya terrenos apropiados, entre ellos, cerca de 96 manzanas entre Belgrano y Liniers, suficientes para hacer en ellas un gran campo de maniobras, polígonos de artillería e infantería y edificar un buen número de cuarteles”.<sup>10208</sup>

Cuando se estableció el campamento de la división del Río Negro, en el punto denominado Las Lajas, las tierras eran fiscales.<sup>10209</sup> Posteriormente, en enero de este año, sin tener en cuenta que la división del Río Negro ocupaba esas tierras, fueron cedidas para colonizar. En consecuencia se ordenó, “...el traslado de la división a tierras fiscales”.<sup>10210</sup> A este respecto, el General Enrique Godoy manifestaba que “...al establecerse el campamento en Las Lajas, solo tuvo en cuenta razones militares, dado que era el punto en donde desembocaban los boquetes de los Andes, de fácil comunicación para transportes, etc”.<sup>10211</sup> En Las Lajas se “...ha empezado ya la construcción de grandes cuarteles, cuyas paredes de piedra, tienen mas de un metro de altura, se ha delineado una villa, Codihué, cuya plaza está terminada, se han hecho sembradíos, todo lo que tendrá que ser abandonado”.<sup>10212</sup>

Fueron necesarias entonces las movilizaciones de campaña y las pandemias en ellas generadas para que las autoridades militares y políticas tomaran conciencia de la necesidad perentoria de construir una infraestructura edilicia que brindara resguardo a la tropa como a la oficialidad.

#### **L-IV.- Conclusiones.**

En otras palabras, las medidas militares estaban diseñadas a imagen y semejanza de los países centrales, en cuyo espejo se observaban los ejércitos de la periferia mundial. Pero la adquisición de material bélico en Europa no garantizaba su puesta en acción, por cuanto periódicamente era preciso tener que modernizar el número y la calidad de sus accesorios, modificar el calibre de los cartuchos y transformar las piezas, las cureñas, los arzones, y los carros de municiones. Por ello, las fallas en el armamento adquirido y los actos de corrupción detectados en el desempeño de las Comisiones destinadas en Europa afectaron el desarrollo de una industria militar nacional, en ese entonces personalizada en la Fábrica Nacional de Pólvora y el Arsenal de Guerra.

Finalmente, las movilizaciones y concentraciones de campaña y las pandemias en ellas generadas fueron vitales para que las autoridades militares y políticas tomaran conciencia de la necesidad perentoria de construir una logística y una infraestructura edilicia que brindara resguardo a la tropa como a la oficialidad. Una logística que se preciara a sí mismo debía contemplar la homogeneización de la indumentaria, la conversión e intercambiabilidad de los recursos (material rodante), los cálculos de tiempo en los aprovisionamientos, la provisión de los insumos auxiliares (agua y combustibles), y la salud y seguridad de la infraestructura vial y telegráfica.

## **Capítulo IV-D-13**

### **Desviacionismo militarista como condicionante exógeno del pretorianismo**

#### **Índice del Capítulo IV-D-13**

- M.- Desviacionismo militarista como condicionante exógeno del pretorianismo
  - M-I.- La militarización de la política mediante las intervenciones federales.
    - M-I.-a. El caso de la intervención a Corrientes (1893).
  - M-II.- La manipulación del servicio militar para nacionalizar al inmigrante (1901).
  - M-III.- La instrumentación de los militares para reprimir el conflicto de clase (Buenos Aires, 1902-1906).
  - M-IV.- Conclusiones.

#### **Palabras Claves.**

conflicto de clase-- confusión identitaria--dependencia tecnológica-- industria militar-- inflación de planta o nómina--empleomanía galoneada--militarización-- orden democrático condicionado-- patrones militaristas--pretorianismo antiguo--pretorianismo árbitro--pretorianismo colonial--pretorianismo moderno--pretorianismo neo-colonial--pretorianismo directo—pretorianismo tácito o indirecto—pretorianismo explícito--pretorianismo potencial o latente--pretorianismo plebeyo o de masas--pretorianismo aristocrático u oligárquico--pretorianismo radical.

#### **Keywords**

Class conflict—identity confusion—technological dependency—military industry—militarization—military patterns—praetorianism—direct praetorianism—indirect praetorianism—ancient praetorianism—colonial praetorianism—modern praetorianism—neo-colonial praetorianism—radical praetorianism—aristocratic praetorianism—oligarchic praetorianism—explicit praetorianism—potential praetorianism-- praetorianism.

#### **M.- Desviacionismo militarista como condicionante del pretorianismo**

La gradual y creciente profesionalización de las Fuerzas Armadas y su consiguiente gradual autonomía del poder político fueron acrecentándose por la intercesión de una serie de elementos históricos que coadyuvaron a ese fin y al negativo condicionamiento de un eventual poder democrático y popular, tales como la transformación del servicio militar de mercenario a compulsivo, y la reiterada participación de las unidades militares en el control de los comicios, en las intervenciones federales a las provincias y en la represión del movimiento obrero.

Este décimo-tercer capítulo lo dividiremos en cuatro apartados, comenzando con la dependencia de la tecnología militar importada de las metrópolis imperiales como

obstáculo para el desarrollo de una industria nacional; siguiendo con la militarización de la política mediante las intervenciones federales; con la manipulación del servicio militar como fuerza asimiladora en la integración del inmigrante (1901); y cerrando con la instrumentación del ejército como fuerza coactiva en el conflicto de clase (Buenos Aires, 1902-1906).

### M-I.- La militarización de la política mediante las intervenciones federales

Amén de la custodia de los comicios en provecho de los oficialismos provinciales, el ejército debía también acompañar las intervenciones federales en el interior del país. Autores como Palcos (1963), Auza (1971), Rafael (1982) y Hardoy (1993), intentaron analizar la participación directa del Ejército en los conflictos provinciales. Se preguntaron estos autores qué estabilidad política podía sustentar a las provincias, si las Comandancias Militares, para rechazar la oposición anti-sistema (extra-republicana) y asegurar el orden intervenían las Provincias en forma directa y ya no sólo en forma disuasoria.

El recuerdo de las intromisiones del ejército nacional en las intervenciones federales estaba muy fresco. El bastardeo de su misión, para el editorialista de *El Tiempo* "...ha asumido, al través de nuestra historia, formas brutales y vergonzosas, que han venido operando ese distanciamiento entre el pueblo y el ejército, distanciamiento cada vez más profundo, hasta el punto de considerar el primero al segundo como a uno de los peores y más terribles enemigos".<sup>10213</sup> Así se veía en ese entonces, que para con el ejército "...no existía ese cariño, ese amor, ese respeto, que en Norteamérica y las naciones europeas ofrecen un admirable espectáculo y son fuente de tan grandes acciones".<sup>10214</sup>

¿Quién no recordaba "...los mil episodios que ofrece la intromisión del ejército en la política, los criminales atentados de las bayonetas nacionales, las formas variadas y casi siempre sangrientas de esa acción contraria a la libertad y a la civilización?".<sup>10215</sup> De todos los factores que concurrieron a la perversión de nuestro sistema institucional, es la intromisión del ejército "...el más odioso y el más repugnante, como que representa la fuerza, primando con sus más brutales manifestaciones, sobre el derecho y la justicia".<sup>10216</sup> El ejército ha sido "...una bestia feroz en continua acechanza, que no desperdiciaba momento oportuno para hundir sus garras en el pueblo, formando charcos de sangre humana, donde se revolcaba gozosa. Nada respetaba: ni las leyes, ni las instituciones, ni el santuario del hogar ni los templos. Todo lo profanaba y pisoteaba... ¿Cómo apartar de la mente el penoso recuerdo de la sangre vertida en los conflictos originados por la intromisión de los jefes y batallones de línea en los días de elecciones? ¿Cómo olvidar los derrocamientos de gobernadores, las revoluciones hechas por tropas de línea, los asesinatos, la larga serie de criminales atentados que nos cubrieron de oprobio, de vergüenza y de luto, cuyas funestas consecuencias estamos todavía palpando por desgracia?".<sup>10217</sup>

De un extremo al otro de la República, en todas las poblaciones, la presencia de un soldado de línea "inspiraba terror".<sup>10218</sup> El brillo de las bayonetas "...era un siniestro anuncio de desgracias y ruina. No sólo la libertad y las instituciones peligraban con su presencia: la vida y la propiedad de los ciudadanos, el pudor de sus mujeres, encontraba en el ejército un enemigo terrible".<sup>10219</sup> Las tropas de línea venían así a convertirse "...en guardias pretorianas de gobiernos espúreos, que validos del apoyo de esas bayonetas, manejan y disponen de sus respectivas provincias como si fuesen fundos

particulares habitados por rotos.<sup>10220</sup> Facilitar el poder militar del país "...a los que no trepidan en emplearlo para tales fines, es no solo criminal sino que demuestra una absoluta falta de tino. Las tropas, empleadas en oficio semejante, se contaminan y gangrenan con la politiquería local, y se convierten en el más adecuado terreno de cultivo para el fermento revolucionario, y aun para el de los motines y pronunciamientos".<sup>10221</sup> Cada joven oficial, "...acostumbrado a dominar una provincia y un gobierno con un puñado de soldados, adquiere el más profundo y justificado desprecio por el pueblo, por la opinión pública, y por el carácter de las gentes".<sup>10222</sup> Así se acostumbran a considerar "...como una farsa el acto electoral, y a comprender que la política no es más que el arte de repartirse entre cuatro paniaguados los puestos y los dineros públicos".<sup>10223</sup> Concluía el editorialista: "¿Qué respeto le pueden inspirar los legisladores elegidos a dedo desde la casa del gobernador, y la mas de las veces con el beneplácito y previo asentimiento del mismo piquete?".<sup>10224</sup>

*El Municipio* fue el diario que primero señaló los peligros que entrañaba para el ejercicio legítimo del régimen institucional de la república, la ingerencia que los poderes públicos daban al ejército en el desarrollo de la política oficial.<sup>10225</sup> Se estaba implantando el sistema atentatorio del militarismo, "...cuyos perniciosos efectos habíamos tenido ocasión de apreciar de cerca en los acontecimientos que se vienen desarrollando desde hace luengos años, en la vecina república uruguaya y que últimamente produjeron el derrocamiento de su presidente constitucional en el Paraguay".<sup>10226</sup> Si había necesidad para los fines de esa política "...de apuntalar a un gobierno de provincia reñido con la opinión pública y que carecía de elementos de fuerza para conservar el poder usurpado a la soberanía legítima, subvertida por medio de la coacción y del fraude electoral, se enviaba una división de ejército que convirtiera la capital y ciudades principales de la misma provincia en plazas fuertes, hollando los principios autonómicos y ultrajando brutalmente los preceptos fundamentales de toda ley, de toda moral y de toda justicia".<sup>10227</sup>

Si un estado cualquiera se hallaba en vísperas de elegir los delegados que la habían de representar en las cámaras nacionales, la fuerza de línea se distribuía estratégicamente "...en los alrededores de los atrios en los días de elección, convirtiéndose así la función pública del comicio libre en una farsa inícuca, en una burla sangrienta que levantaba justas protestas de indignación en las masas populares canallescamente rechazadas de las urnas receptoras de votos".<sup>10228</sup> Y así en todo: el ejército servía "...de agente automático de una política extraviada y atentatoria que merecía el dictado de dictadura anónima o simulada, porque en realidad de verdad no era otra cosa que una dictadura sin nombre y a la cual el ejército servía de guardia pretoriana, o más bien dicho de infamante pedestal de bayonetas".<sup>10229</sup>

Para *El Municipio*, "...todas nuestras predicciones se han cumplido: el militarismo se ha impuesto y está ejerciendo presión sobre el ánimo del primer magistrado. Como se sabe, el doctor Sáenz Peña, se ha negado a promulgar la Ley de Amnistía que a favor de los revolucionarios de Septiembre le solicitaba el pueblo, el parlamento y el gabinete y se ha negado porque varios jefes militares con mando de fuerzas le aconsejaron que no cediera".<sup>10230</sup> Los militares honrados estaban confinados en las fronteras "...o vegetaban en los cuarteles y los que no conocían la vergüenza ni el pundonor ni el carácter obtenían grado sobre grado ocupándose en llevar chismes a los césares de la casa de gobierno, cuando no eran destinados para el desempeño de comisiones más deshonestas y amenguadotas".<sup>10231</sup> Por el contrario, para la sarcástica pluma de *El Municipio*

“...mucha canalla galoneada paseaba entonces en Palermo en lujosas carretelas arrastradas por troncos de rusos pagados por el Banco Hipotecario o lucía uniformes recamados de oro por la calle de la Florida. Y todos eran héroes de los saraos mundanales o de los camarines de los artistas, donde iban en misiones confidenciales a obtener sonrisas o favores para sus amos”.<sup>10232</sup>

Asimismo, estas intervenciones federales eran la fuente de empleo y un espacio para las tentaciones no santas y un eventual descrédito para innumerables oficiales, que por carecer de mando de tropa optaban por esta salida laboral.<sup>10233</sup> Los ejemplos de abuso de nombramiento de militares en las cárceles y comisarías, que venía dando el Gral. Francisco Bosch en la provincia de Buenos Aires en 1893, con menoscabo de la autoridad del designado Interventor Eduardo Olivera, habrían movido al General Liborio Bernal, jefe de las fuerzas interventoras en Santa Fe, a “...extralimitarse en el desmoralizador estímulo, llegando hasta la insubordinación contra el [Interventor] Dr. Baldomero Llerena”.<sup>10234</sup>

De los hechos producidos con motivo de la intervención federal en Santa Fe, decretada por el ministerio de Manuel Quintana (1893), se desprende que el Interventor Dr. Baldomero Llerena, con el fin de demostrar su imparcialidad, “...concedió a jefes del ejército la mayor parte de las comisarías generales y algunas jefaturas políticas, poniendo, como es natural, lógico y de sentido común, a los comisarios bajo las ordenes de los jefes políticos y a estos bajo las ordenes de la Intervención, de manera que indirectamente las comisarías dependen por intermedio de las jefaturas, del interventor”.<sup>10235</sup> Pero esta escala jerárquica no era respetada por los jefes de guarnición establecidos en casi todas las cabeceras de las provincias intervenidas. Esta escala había sido ordenada por la superioridad, “...lo dispuso el representante del ejecutivo y debían obedecer desde el Gral. Bernal hasta el último soldado, puesto que una ley del Congreso, un decreto de la presidencia y los nombramientos ministeriales, dicen claridad suma que las fuerzas militares en la provincia están en absoluto al servicio de la intervención”.<sup>10236</sup> Sin embargo, en las provincias intervenidas, para los comisarios generales las órdenes debían emanar del jefe de la guarnición, y para estos últimos, las órdenes debían originarse en el Ministerio de Guerra.

En ese sentido, a juicio del periodista Deolindo Muñoz, de *El Municipio* (Rosario), el Ministro del Interior Dr. Manuel Quintana exageraba la intervención militar, “...repartiendo batallones, baterías y escuadrones en once de las catorce provincias de la república, con la diferencia que los estados oprimidos por mandatarios afiliados al mitrismo, son los más favorecidos en el reparto”.<sup>10237</sup> Pero no era el traslado incesante de batallones ni el envío de fuerzas a las provincias ni la distribución del ejército por las capitales lo que inducía “...a sospecha y mueve a estudio escrutador de propósitos y fines”.<sup>10238</sup> Lo que en realidad y con justicia ponía en tensión los nervios, para Muñoz, era “...el prurito de abarcar toda la república cruzándola por distintos puntos en son de guerra como imposición de paz, con tendencias precisas y manifiestas, sustituyendo en ciudades, pueblos y colonias los elementos civiles de policía urbana por militares de alta graduación que acaparan y absorben el funcionamiento normal de las jefaturas políticas y las comisarías generales”.<sup>10239</sup>

#### M-I.-a. El caso de la intervención a Corrientes (1893).

La realidad tratada en el caso de Corrientes, en 1893, es enteramente distinta pues prevalecía en ella la situación de guerra civil entre Autonomistas y Liberales, que había detonado dos años antes, el lunes 20 de julio de 1891, con el alzamiento del Batallón provincial de Guardia-cárceles que dio muerte al Coronel Robustiano Vera, al Mayor Alegre y al Capitán Julián Godoy, lo cual obligó al Gobierno Nacional a enviar primero al Jefe de la Guarnición del Chaco Austral (Resistencia) General Antonio Dónovan, y dos años después, cuando la lucha se vuelve más abierta, al jefe de la Guarnición del Chaco Central (Formosa), General Napoleón Uriburu, con los regimientos 6 y 9 de caballería.<sup>10240</sup>

Es a mediados de Agosto de 1893, cuando con motivo de la caída del Ministerio de Aristóbulo del Valle, que estalló un movimiento revolucionario liberal-radical, extendido a toda la provincia, comenzando en Saladas y continuando en Empedrado, Esquina, Goya y Bella Vista, con cargas de caballería incluidas, y culminando con la toma de la Capital.<sup>10241</sup> Finalmente, la intervención del Dr. Leopoldo Basavilvaso,<sup>10242</sup> enviada por el Ministro Quintana, custodiada por las tropas de la Guarnición del Chaco Central (Formosa) al mando del General Napoleón Uriburu, puso fin a la rebelión, convocando a elecciones y colocando en funciones a los electos por el Colegio Electoral: los liberales Valentín Virasoro y Daniel Artaza.<sup>10243</sup> Al llevarse a cabo con la Intervención del General Uriburu (no podía ser el General Dónovan por haber quedado desacreditado con su gestión de 1891) el desarme y licenciamiento del batallón Seguridad, "...en presencia del señor Jefe de policía de la provincia, y de jefes y oficiales de ese cuerpo, fueron licenciados 16 soldados".<sup>10244</sup> Según resultó después, dichos soldados "...eran criminales con causa abierta ante los tribunales de la provincia (parte del Comandante Bengolea y nota del Superior tribunal de justicia Nos 4 y 5) lo que motivó el cambio de oficios que van anexos, entre el señor juez del crimen y el que firma".<sup>10245</sup>

En la campaña Correntina, los distritos más reacios al desarme fueron Saladas y Mercedes. En Saladas, el Mayor José María Pérez, disolvió "...un grupo de 160 ciudadanos movilizados por el Juez de Paz de la localidad".<sup>10246</sup> En Mercedes, tanto el jefe policial como el coronel Eustaquio Acuña, "...eludieron el cumplimiento de la orden de disolución y desarme, y esquivando la acción de las fuerzas nacionales se dirigieron a marchas forzadas hacia San Roque. El llamado Corazón Sotelo, subalterno de Marciano Núñez [hermano del oriental Coronel José Núñez, jefe de las fuerzas Autonomistas, responsable de la Matanza de Saladas] contestó con el fuego a la intimación. Bastó desplegar una pequeña guerrilla y hacer algunos tiros para que se desbandara la fuerza que mandaban, tomándoseles las caballadas con la marca nacional".<sup>10247</sup> La disolución de la banda del sanguinario represor Corazón Sotelo "...fue un positivo beneficio para el aterrorizado vecindario de Mercedes, pues según los despachos oficiales del mayor Pérez, en un solo día y en un establecimiento de campo, habían sido lanceadas ochocientas reses y en otras habían saqueado dando muerte a los mayordomos. "Esto pasó de los hechos de los indios" me decía el Mayor Pérez, oficial que ha hecho la guerra de fronteras, en uno de sus partes".<sup>10248</sup> Y estos hechos no debían ser considerados según Uriburu como actos aislados, pues "...tengo en mi poder numerosos telegramas de todos los puntos de la provincia, suplicándome en ellos, la protección de las fuerzas de la nación contra las depredaciones y violencias de todo género ejercidas por jefes que invocaban órdenes del Gobierno provincial, que me resistiría a creer si no obrara en mi poder un documento reservado que comuniqué al Señor Ministro del Interior con fecha 10 de agosto".<sup>10249</sup>

Como consecuencia lógica de tales desmanes, “...toda la población civil de los departamentos de campaña y parte de la que pudo abandonar la capital se **guareció en los bosques** donde los unió el común peligro. El Coronel provincial [Secundino] Insaurrealde, atacado en su estancia, repelió la fuerza con la fuerza y rechazó el asalto policial, pero como saliera de su domicilio con los suyos en armas, el capitán José María Lozano, del 11 de caballería en cumplimiento de sus instrucciones, desarmolo y licenció sus parciales, quedando el jefe bajo la custodia y garantía de la fuerza nacional”.<sup>10250</sup> El Comandante Lindor Soria declaraba en su foja de servicios que fue al Departamento Empedrado (Corrientes) desde Formosa con el Batallón 7º a ordenes del mayor Rosendo Fraga, “...adonde tomamos todos los presidiarios sublevados y bien armados tomando yo una parte muy activa evitando un gran conflicto pidiéndole yo al Mayor Fraga que no hiciera romper el fuego y que me permitiera él ir yo solo adonde estaban las guerrillas de ellos a ver si conseguía de hacerlos entregarse llegando a ellos: Unos opinaban el matarme y otros el no pero por fin garantiéndole la vida por parte del Gobierno conseguí el llevarlos al Jefe quien los mandava como también sus Oficiales a donde estaba el Mayor Fraga con nuestras guerrillas conseguimos al rendirlos sin un solo tiro”.<sup>10251</sup>

## **M-II.- Manipulación del servicio militar para nacionalizar al inmigrante (1901).**

La nueva función del ejército, que desvirtuaba el rol de las guardias nacionales, y venía a expropiar las funciones que siempre fueron indelegables de las instituciones de la sociedad civil, devendría ahora --con el servicio compulsivo como bien lo sostiene Rouquié (1981)— en la responsabilidad de encarar la formación cívica y moral de la juventud y paralelamente ser el antídoto contra el cosmopolitismo que se había generalizado.<sup>10252</sup> Mientras los oficiales del ejército (entre ellos el General E. Godoy) adhirieron al proyecto de servicio militar del General Alberto Capdevila, que establecía el servicio mercenario con instrucción obligatoria combinada con las guardias nacionales; los diputados civiles suscribían el proyecto del Ministro de Guerra Pablo Riccheri, de servicio militar obligatorio.<sup>10253</sup>

En ese sentido, durante la gestión de Capdevila al frente del Estado Mayor se practicaron las grandes movilizaciones de fines de siglo, tanto en Curumalán y Dennehy (Buenos Aires), como en Codihue (Neuquén), Arcadia (Tucumán), San Lorenzo (Salta), Marquesado (San Juan), Paracao (Entre Ríos), Challao (Mendoza) y Tinogasta (Catamarca).<sup>10254</sup> En esas movilizaciones, los campamentos seguían el molde de una traza urbana, y en sus alrededores abundaba todo tipo de comercio minorista.<sup>10255</sup> El de Villa Mercedes se había instalado en un ex aserradero, en medio de un monte espeso, a dos leguas de la ciudad de Villa Mercedes.<sup>10256</sup> Las carpas, que eran importadas de la fábrica Salzmann & Cía., radicada en Cassel (Alemania), apenas si eran impermeables y no se podían sostener en pie cuando arreciaban tempestades como las que hubo que sufrir en Curumalán.<sup>10257</sup> La salubridad, si bien era tenida en cuenta, no alcanzó para prevenir epidemias.<sup>10258</sup> Por cierto, la provisión de vituallas y víveres seguía una discriminación rayana con el feudalismo.<sup>10259</sup> Finalmente, las marchas de resistencia también provocaron toda suerte de polémicas, pues no estaban contempladas en la legislación.<sup>10260</sup>

No se podía negar, que si el proyecto Riccheri hubiera querido evitar tanto el militarismo como el pretorianismo debió haber preservado la dualidad entre el ejército

de línea y el ejército de milicia. Pero esta dualidad imponía la reorganización de la guardia nacional, pues siendo el ejército de línea un simple cuerpo de vanguardia “...que no se debe ni se puede considerar como plantel de una gran movilización, desde que si le aprovecharan como tal y no como vanguardia, nos expondríamos a la invasión del territorio y a la derrota antes del combate”, debía ser por tanto la guardia nacional “...el verdadero elemento en caso de guerra”.<sup>10261</sup> La guardia nacional, en el sistema que regía en ese entonces, debía organizarse, a juicio del periodista Muñoz, en forma tal, “...que a los quince días de una declaración de guerra pueda lanzar toda su primera línea sobre la frontera, estando en perfectas condiciones de instrucción, armamento, servicios auxiliares, y equipos”.<sup>10262</sup> Pero el Ministro Riccheri, al comienzo de la segunda presidencia de Roca, había rechazado la propuesta del Diputado Capdevila para instituir cursos para la oficialidad de las Guardias Nacionales.

La tendencia proclive al Servicio Militar Obligatorio era, para *El Diario*, hasta cierto punto “...sino extraña, muy superior al asunto militar, por cuanto hace del ejército, además de la institución armada de la república, un complemento de la escuela, en curso de instrucción práctica y superior que corrige omisiones y la reemplaza fundamentalmente en los que por una causa u otra no pasaron por las clases primarias”.<sup>10263</sup> En otras palabras, el ejército habría desnaturalizado su función específica como instrumento de la defensa externa para venir a desempeñar un rol pedagógico, mitigando o paliando los déficits educativos de la población. Para esa tarea educativa, en lugar de enviar a los analfabetos a la escuela, becándolos, y/o hacer obligatoria la educación secundaria, se hizo compulsiva la instrucción militar.

El ejército constituiría entonces para el Diputado Mariano Demaría la institución preparatoria del sufragio universal, y para *El Diario* “...un gran colegio de hombres jóvenes, en el cual aprenderían no solamente lo que en los primeros años no pudo enseñárseles, sino que, ya perfectamente maduros para todas las concepciones, esos jóvenes aprenderán a querer a su país, sirviéndolo y, en esta disgregación nacional, que opera el desierto y la distancia, entre los núcleos poblados, sería también un vínculo, un gran internado, que fundirá en un solo tipo, todas las diferentes facciones de la fisonomía nacional.”<sup>10264</sup> Finalmente, *El Diario* terminó por desdeñar el proyecto de Capdevila y por apoyar el proyecto del Ministro Pablo Riccheri (6-2-A).

Las principales naciones militares de la Europa, después de haber pasado por ensayos y transformaciones sucesivas con respecto a su organización militar, llegaron por la experiencia a establecer “...una organización, sino completa, al menos acabada en lo referente a la armonía de los diversos y variados elementos que concurren a su establecimiento, de manera que satisfaga y responda a las necesidades peculiares de la milicia, considerada bajo su doble faz de ciencia y arte”.<sup>10265</sup>

En esos tiempos finiseculares, se puso de moda el precepto geopolítico de la Paz Armada. La paz armada se imponía a los pueblos “...guardianes celosos en la custodia de la integridad nacional, no obstante el distanciamiento cada vez más pronunciado de las causas generadoras que antiguamente hacían alzar en armas unos estados con otros”.<sup>10266</sup> Debilitada la diplomacia del poder irresistible con que en ese entonces se hallaba investida, el periodista Paracao, en un rpto premonitorio sostenía que “...dejando a sus espaldas después de sus grandes conquistas en el campo de la civilización y de la ciencia, el aforismo de: todo por el derecho de la fuerza, que tan desastrosos resultados produjo en su época misma; ...en el estado actual de la

civilización y los progresos alcanzados por los principios del derecho internacional universalmente aceptado, los *casus belli*, si bien serán mayormente meditados, no por eso serán imposibles ni dejarán de producirse con todo el séquito de sus devastadores resultados”.<sup>10267</sup>

Es por esta causa, por el instinto de la propia conservación nacional, que eran de imperiosa necesidad los ejércitos permanentes, “...máxime cuando, como entre nosotros, sirven de plantel para la instrucción militar de los pueblos, representados por su masa ciudadana, que es su fuerza viva nacional y que debe por todos los medios educarse para ponerla en condiciones de contribuir con el contingente de sangre exigible”.<sup>10268</sup>

Considerando el elemento genuino de nuestro ejército, el carácter propio que de modo invariable es peculiar a todo su personal de tropa, el sistema hoy en práctica, “...no puede ni podrá jamás llenar por su defectuosa organización las necesidades que informan su sostenimiento, al satisfacer siquiera relativamente, los principios militares que presiden a su instrucción”.<sup>10269</sup>

Nuestra cultura y temperamento, nuestra historia y nuestras aspiraciones, reclamaban para el criterio del periodista de *El Tiempo* que “...se modifique la ley en vigencia sobre el reclutamiento del ejército, desde que, en las presentes circunstancias, carecen de bondad en todo sentido, es impolítica y hasta inmoral”.<sup>10270</sup> Los principios militares que regían la organización militar de las naciones civilizadas “...son en el hecho los mismos e idénticos en sus fines, y, si en apariencia existe discrepancia en sus formas, no hieren ni varían de seguro su fondo, que permanece único e inalterable”.<sup>10271</sup>

La ley que puede cambiar la práctica actual de remonta ciudadana estaba ya desde hacía largos años promulgada; y si bien es cierto que “...su no realización nos ha privado de la inapreciable experiencia que nos brindara su ensayo, el adelanto que ha invadido en estos últimos años la agrupación armada, la enseñanza recogida con el sistema actual en uso y el examen comparativo y detenido de los resultados alcanzados por otras naciones nos habilitan para aceptar las bondades en nuestro propio país e incorporar a los progresos realizados por nuestro ejército los beneficios que en alto grado llevaría a sus filas dignificándolas, el servicio obligatorio personal”.<sup>10272</sup>

Era preciso entonces para dicho periodista despojarse de añejas ideas y viciosas preocupaciones, “...admitiendo las ideas modernas, que marchan a vanguardia del espíritu liberal del siglo, y no dejarnos vencer por temores que hoy día no tienen justificación racional ni lógica”.<sup>10273</sup> Máxime, cuando todas nuestras instituciones sociales, políticas, religiosas, económicas, administrativas y hasta domésticas, “...proclaman de consuno la implantación del servicio militar en semejante forma y como medio para evitar la anemia que consume la educación y preparación de nuestros soldados”.<sup>10274</sup>

El enganche reducía a un cierto número de ciudadanos el ingreso a las filas del ejército, y esas incorporaciones “...muchas veces se producían aún en contra de la libre voluntad del enganchado, como hemos tenido oportunidad de enterarnos, en infinito número de recursos presentados ante los jueces de la sección”.<sup>10275</sup> Tenía el grave inconveniente de “...admitir a individuos desprovistos de toda noción de moral y hábitos de trabajo, sin

ninguna vocación por la profesión y sin amor por la carrera, que es lo que inculca fuera de duda la buena voluntad en el servicio”.<sup>10276</sup>

El coronel Ricardo A. Day y el teniente coronel Augusto Maligne habían elaborado un proyecto de reclutamiento basado en el servicio obligatorio, que llevado a la práctica y salvando en él algunas deficiencias de detalle, le proporcionaría al país un ejército en armonía con el estado de civilización de la República.<sup>10277</sup>

Repetidas veces *El Tiempo* había combatido el sistema de reclutamiento vigente a fines de siglo, y “...hemos demostrado que las milicias no constituyen y no pueden constituir el verdadero ejército de un país, dados los medios de movilidad y la rapidez con que se desarrollan las campañas modernas”.<sup>10278</sup> La guerra de secesión, en que los beligerantes pasaron cerca de un año instruyendo sus milicias antes de poder emprender verdaderas operaciones de campaña, y “...la facilidad relativa con que los alemanes dominaron 1870-71 el levantamiento en masa del pueblo francés, son ejemplos que las naciones deben tener presente siempre”.<sup>10279</sup>

La campañas de nuestra época exigen que inmediatamente después de declarada la guerra, todas las fuerzas de la nación, perfectamente instruidas, armadas y equipadas, se reconcentren en la frontera amenazada y entren con toda rapidez en operaciones.<sup>10280</sup> Estas exigencias solo podía cubrirla la “nación armada”. Por tanto, “...aplaudimos y aplaudiremos siempre toda iniciativa que tienda a plantear entre nosotros el sistema de reclutamiento basado en el servicio obligatorio, que es el único que puede perfeccionar y preparar todas las fuerzas vivas de la nación para defender su integridad.”<sup>10281</sup>

### **M-III.- Instrumentación de los militares para reprimir el conflicto de clase (1902-1906).**

Las movilizaciones de las diferentes colectividades y las huelgas obreras transcurridas a fines del siglo XIX, preanunciaban la profundización de los conflictos de clase.<sup>10282</sup> En la propia Revolución del 90, diversos autores han destacado la presencia de numerosos elementos populares y la angustia generalizada que la capitulación (29-VII-1890) había infligido en las filas de artesanos y obreros.<sup>10283</sup> Cinco años después, en 1895, se declararon en huelga una veintena de gremios parando 25.000 obreros, y en 1896 fueron a la huelga 25 sindicatos con alrededor de 24.000 huelguistas.<sup>10284</sup> Seis años más tarde, en 1902, el total de huelgas alcanzó a casi medio centenar, la mitad en el rubro manufacturero y la otra mitad repartida entre ferroviarios y portuarios.<sup>10285</sup>

Durante dichas huelgas revolucionarias, los altos mandos militares aceptaron que los gobiernos los utilizaran como fuerza de choque, comisionando destacamentos inter-armas para guardar el orden público.<sup>10286</sup> En esa tarea represiva o pretoriana se encontró el Coronel Juan P. Manzano, quien fue comisionado en dos oportunidades consecutivas. La primera ocurrió el 25 de noviembre de 1902, al frente de un destacamento compuesto de las tres armas, integrado por el 5o de Infantería, el 9o de Caballería, y un Batallón del 2o de Artillería, acantonado en Barracas al Sud (Mercado de Frutas). Disuelto el Destacamento inter-armas, volvió con su Batallón a la Capital el 30 de noviembre, pasando a Campo de Mayo el 1 de agosto de 1903, desde donde volvió a actuar durante la huelga del 30 de noviembre de 1904.<sup>10287</sup>

También se destacaron contingentes armados en oportunidad de las huelgas ferroviarias. El Teniente Coronel Belisario Villegas (14-10-I), residente en Córdoba, hizo presente que en los días de la Revolución de 1905 “...aún duraba la **huelga de los obreros y ferrocarrileros del Central Argentino y Central Córdoba** y que había orden del Jefe de la Región de enviar a cualquier hora la tropa que solicitara el Jefe de tráfico de esas líneas; servicio que a diario era solicitado y prestados para custodiar los trenes, estaciones y barreras durante la noche”.<sup>10288</sup> Y en el Ferro-Carril Buenos Aires al Pacífico, el Gerente A. B. Marbug Green le agradece el 10 de diciembre de 1906 al Ministro de Guerra General Rosendo Fraga, los “...importantes y eficaces servicios que le ha prestado el Jefe del 1er Batallón del Regimiento 8 de Línea Teniente Coronel Don Manuel Faramiñán [9-13-A], en los Talleres del Ferro-carril sito en Bahía Blanca”.<sup>10289</sup>

## **M-IV.- Conclusiones.**

Cuando el orden burocrático-oligárquico no pudo perpetuar más sus estructuras y dispositivos de dominación civil y militar ensayó operaciones de militarización de la política destinadas a nacionalizar al inmigrante y a esmerilar o condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden democrático-popular. En esa tarea militarizadora los gobiernos apelaron a una grueso herramental de manipulaciones e instrumentaciones entre las cuales se encontraban la represión del conflicto de clase, las intervenciones federales en las provincias, el servicio militar obligatorio, y la modernización armamentista dependiente en perjuicio de una industria nacional.

## **Capítulo IV-D-14                    Etiquetismos descalificadores en la burocracia militar.**

### **Índice del Capítulo IV-D-14**

#### **N.- Etiquetismos descalificadores en la burocracia militar.**

- N-I.- La inflación de planta o nómina como devaluación de la carrera y la profesión militar.
- N-II.- La rotación de arma como envilecedora de la calificación militar (armas, fuerzas).
- N-III.- La manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma (1904-1910).
- N-IV.- La discriminación política en las sanciones, promociones y retiros (1892-1905).
- N-V.- La segregación social de las familias de los enganchados.
- N-VI.- Conclusiones.

## **Palabras Claves**

Burocracia pretoriana--devaluación de la carrera militar--inflación de planta-- rotación de arma-- pases, destinos y cambios de arma-- prisiones, promociones y ascensos.

### **Keywords**

Arm rotation—military devaluation—prisons and promotions—praetorian bureaucracy.

## **N.- Segregacionismo Estructural Endógeno como agente de la Burocracia Pretoriana.**

La atribución de la caída del régimen democrático en 1930 es centrada por Potash (1971) exclusivamente en las políticas militares internas del último gobierno de Hipólito Irigoyen (1928-1930); y por Rouquié (1981) en el indudable influjo que ejerció en las filas del ejército la formación Prusiana. Con esos criterios, entre las políticas precipitadoras de la crisis, Potash asigna un rol determinante a las conductas favoritistas adoptadas por el Ministerio de Guerra de Yrigoyen en las promociones y ascensos, y Rouquié a la formación y viajes a Europa de los oficiales que cursaban la Escuela Superior de Guerra, los cuales alimentaban las ambiciones del ala nacionalista del ejército (1900-1913), en perjuicio de la más antigua ala liberal.<sup>10290</sup> Con esas interpretaciones inmediateistas, tanto Potash como Rouquié omiten indagar un pasado algo más remoto y más abarcador, cuando la amenaza militar comprendía a los estados vecinos y el enfrentamiento político interno se daba entre oficiales radicales y conservadores (1890-1905).

Este décimo-cuarto capítulo lo dividiremos en seis (6) apartados, comenzando con la diagramación institucional y material como fuente de estrategias militares, continuando con la inflación de planta o nómina como devaluación de la carrera y la profesión militar, y con la rotación de arma como envilecedora de la calificación militar (armas, fuerzas); prosiguiendo con la manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma (1904-1910), y con la discriminación política en las prisiones, promociones y retiros (1892-1905); y culminando con la segregación social de las familias de los enganchados.

### **N-I.- La inflación de nómina o planta como devaluación de la carrera y la profesión militar.**

La juventud que se debilita moralmente o que se reblandece, en cualquier lugar del mundo, se vuelve clientelar o empleomaníaca, y “...gasta los tesoros de su inteligencia y de su energía en la corte oficial, donde todos se compra y se vende, la conciencia del individuo, el interés del estado, la dignidad personal y la de la patria”.<sup>10291</sup> Y aludiendo a la juventud argentina, Deolindo Muñoz, el director de *El Municipio* (Rosario), no quiere limitar “...el significado de la palabra a ese núcleo especial, compuesto por los *deplacés*, los compadritos barnizados de bachilleres, los holgazanes que por llevar corbata y traje limpio se consideran destinados a ser pensionistas perpetuos del presupuesto, horrorizándose cada vez que se los invita a trabajar y producir riquezas”.<sup>10292</sup>

Desgraciadamente, para Muñóz, el presupuestismo ha cundido también “...en otra clase de personas, que cuentan con títulos doctorales y hasta con verdadera inteligencia. Jóvenes ilustrados, capaces de conquistarse una posición independiente, aptos para contribuir en forma eficaz al desarrollo científico, democrático y material de la república, lo olvidan todo, inclusive su buen nombre, para ganarse una protección, para ser esclavos dorados de una oligarquía infausta en cambio de un empleo y de una fortuna mal adquirida, que con el diablo viene y con el diablo se va”.<sup>10293</sup>

La inflación o sobre-dimensión de nómina o de planta en el ejército, se daba la mano tanto con la desmovilización en las inmediatas pos-guerras, como con la inflación armamentista, producto de las operaciones de la Comisión para compra de Armamentos en Europa, dependiente del Estado Mayor General del Ejército.

Con la desmovilización de los ejércitos en las inmediatas posguerras, la sobrepoblación relativa de los cuadros de oficiales se incrementaba notoriamente, pues una gran parte de ellos dejaba de percibir destino y mando de tropa.<sup>10294</sup> Una forma de paliar esa desocupación formal calificada consistía --como hemos visto en el capítulo anterior-- en emplearlos en ocasión de las intervenciones federales a las provincias, con todas las tentaciones y los riesgos de corrupción consiguientes.<sup>10295</sup> Esos mismos riesgos se correrían en casos de intervenciones externas, como han sido recientemente los casos de Croacia, Medio Oriente y Haití.

También las amenazas de guerra potenciaban la inflación de planta. Dotado de un presupuesto record de trece millones de pesos, debido a la amenaza de guerra con Chile, el ministro de Guerra y Marina Gral. Pablo Riccheri se había echado encima en el curso del año 1901 la carta blanca de nombrar el personal de su departamento, pues el señor ministro “...se vé asediado por postulantes, influencias y cotejantes de todo género, que lo siguen y lo persiguen como un enjambre de moscas a un panal. Al principio la tarea era agradable porque la cortesanía excogitaba sus fórmulas y expresiones más galantes y seductoras para enternecer al feliz dispensador de empleos y sueldos por trece millones de pesos pero a fuerza de saborear el almíbar, empieza a resultarle empalagoso”.<sup>10296</sup>

Los datos que suministró el Ministro Riccheri en el presupuesto, como frutos de sus investigaciones, le revelaban al periodista de *El Diario* “...que este ejército nuestro, es un macrocéfalo, se le ha ido en vicio la cabeza, el elemento mandante y figurante, el que toma la carrera como un empleo cómodo, honroso, bien asignado y glorioso, lo que no pasa con los demás empleados de la administración que considerados como conchabados, jornaleros sin gloria y sin patriotismo”.<sup>10297</sup> Se explicaba pues, que la “...empleomanía galoneada haya tomado tanto vuelo, hasta convertirse en una deformación militar, en un cáncer que se come los más vitales recursos y energías de reorganización militar, insumiéndose más de un 50% del presupuesto en costear esos lujosos rótulos, destinados a gravitar sobre el presente por el sueldo y sobre el futuro por la pensión”.<sup>10298</sup>

Los informes del ministro revelan que la sobre-dimensión del personal de mando, que según Scobie (1964) y Ramírez (1987) estaba en 1896 a un oficial por cada siete soldados,<sup>10299</sup> un lustro más tarde devino “...en la ridícula proporción de un oficial por cuatro plazas de tropa, sobrando 300 jefes que no tienen ubicación en el ejército, cuyos servicios son inaplicables, regalada ociosidad que cuesta al país un millón de pesos al año”.<sup>10300</sup> Este absurdo era para el editorialista anónimo de *El Diario* necesario

corregirlo, "...pues al paso que vamos el ejército llegará a ser pura galonería; ya hoy para 7000 soldados hay 600 jefes y oficiales; casi en la proporción del ejército de la opereta, y como todos los años el número aumenta por la provisión de las fábricas montadas con el título de escuelas y colegios, en breve podría llegar el vicio a su colmo".<sup>10301</sup>

El ministro se encontraba con que le sobraban centenares de jefe y oficiales que no sabía "...que hacer con ellos, ni donde ubicarlos que no estorben".<sup>10302</sup> A esos 300 jefes y oficiales que no tenían ocupación alguna, *El Diario* sugería que "...se les puede transformar en empleados que al fin y al cabo devolverían en servicio algo de lo que reciben de sueldo. En el correo, en la aduana, en distintas reparticiones se podrían ubicar, bien entendido sin sobresueldo, ni yapa de ningún género, como un medio de no tirar el dinero en ociosidades, y ya que tenemos este mal de la burocracia y empleomanía militar, debemos hacerla lo menos onerosa posible".<sup>10303</sup>

Se hallaba entonces el Ministro Riccheri con "...más de 300 oficiales de Teniente a General que sobran y que no tienen más tarea que hacer acto de presencia todos los meses a cobrar el sueldo y accesorios".<sup>10304</sup> El ministro tenía pensado "...hacerlos cambiar de armas, ya que no tiene que hacer con la espada, que sirvan al país que tan fatigosamente los costea, con la pluma, que se conviertan en lugar de empleomanía armada, en burocracia de pluma".<sup>10305</sup> Pero parece ser que el Ministro hubo de desistir de su temerario propósito, pues "...la grita que se le va a armar será ensordecedora, hasta llegar a oídos del Presidente de la República que la escuchará y dejará que se consuma un millón de pesos en esta ociosa vivandería; los aludidos por la iniciativa del Ministro, protestarán por este rebajamiento de su clase y estado, entendiendo que es humillante para la carrera esta promiscuidad de funciones que hace servir a un militar lo mismo para un fregado que para un barrido".<sup>10306</sup>

Para darles ocupación, *El Diario* sostenía que habría que "...cuadruplicar el ejército actual, elevar sus plazas a 30.000 soldados y ya con 7.000, el presupuesto está reventado, con 30.000 haría un crack".<sup>10307</sup> De manera que esta empleomanía militar o militarismo que "...nos ha invadido, es el de la peor especie, porque no solo impone al estado el costo del personal, sino que para darle figuración exige que se le provea del elemento y del medio en que actuar. Así es como empieza a formarse el militarismo, por la cabeza, por la parte figurante, y luego a esos soberbios estados mayores hay que dotarlos de la decoración de un poderoso ejército permanente que escuse si no justifica la empleomanía galoneada".<sup>10308</sup>

Pero ya que "...el mal no tiene remedio en lo hecho, porque esta empleomanía galoneada es privilegiada y su empleo es una propiedad personal; a lo menos que el abuso se corrigiera para lo sucesivo, que se restringiese la fabricación de profesionales que anualmente salen de los institutos y talleres en que el gobierno fomenta y crea los que después no sabrá que ocupación darles, e irán a engrosar las planas ociosas".<sup>10309</sup>

El exceso de ingresos y graduaciones en el Colegio Militar había generado entonces, con el correr del tiempo, una hipertrofia de oficiales jefes: coroneles, tenientes coroneles y mayores. Debe tenerse en cuenta que a partir de las reformas impuestas por el Ministro Riccheri, los graduados del Colegio Militar entraron a monopolizar en la fuerza los cargos y las promociones, como más tarde lo hizo la Escuela Superior de

Guerra para con los oficiales superiores, subordinada al Consejo de Enseñanza de Institutos Militares.<sup>10310</sup>

Por el exceso mencionado, un periodista que firmaba con el seudónimo de X en *El Diario*, descubría nuevas estadísticas y manifestaba en 1902 que "...cuando se llena sin cesar un recipiente, forzosamente algún día rebasa. Cuando en un año fallecen o pasan a retiro 15 jefes y se da de alta a 100 alféreces, el escalafón se llena con exceso, y como esta mala aritmética no impide que los oficiales asciendan de vez en cuando, no son los alféreces que sobran luego, sino los jefes".<sup>10311</sup> La oficialidad, que alcanzaba "...las 600 plazas cuando teníamos 40.000 hombres en el Paraguay y las fronteras (1864); que es en 1902 de 1550; que será, en 1903, de 1700, alcanzará en 1905 a ser de más de 2000, sin contar 4650 oficiales de reserva y algunos miles de guardia nacional con nombramiento provincial".<sup>10312</sup> Este aumento creciente en el número de la oficialidad de línea "...encierra inconvenientes para el país y gravísimo peligro para la misma actual oficialidad, el que consiste en hacer luego imposible el sostenimiento de tan desproporcionados cuadros e inevitable el pase a planas mayores de las cuatro quintas partes de ellos. Si los actuales jefes y oficiales conociesen sus intereses pesarían con su influencia, que es incontrastable, para que la alta dirección del ejército intervenga para salvar la carrera que han abrazado y la inevitable ruina de derechos adquiridos".<sup>10313</sup>

Si el Gobierno no conjuraba a tiempo el peligro de ese exceso de planta, o militarismo profesional, que ya se hacía sentir en las finanzas, el gobierno se encontrará al fin, pronosticaba trágicamente *El Diario*, "...con que está fomentando un mal terrible, no solo para el tesoro, sino para las instituciones".<sup>10314</sup> Pues ese sobrante de mano de obra militar, altamente calificada, presionará sobre el estado para lograr ser reconocido. Si ese reconocimiento no era alcanzado dentro de las instituciones liberales y republicanas otro tendría que ser el anfitrión. Y ese anfitrión vendría a ser, con el correr del tiempo, el estado de excepción, donde sí podría el oficial subocupado encontrar un destino acorde con su capacidad y su status, y como decía *El Diario* se los podría ubicar "...en el correo, en la aduana, en distintas reparticiones".<sup>10315</sup>

El problema era pues, para *El Diario*, de practicar medidas previsoras, "...si no se puede aplicar a la empleomanía militar el recurso que se aplica a la burocrática, que sería la cesantía por razones de economía, el ministro Riccheri haría un servicio al país y al mismo ejército limitando la producción del personal de mando que se forma en las escuelas militares de diversa categoría".<sup>10316</sup> Por ello, *El Diario* manifestaba que el militarismo va a ser "...un derivativo del doctorismo que el gobierno se prometía combatir por su plan de reforma educacional; los doctores disminuirán, ya están disminuyendo por necesidad, pero se irán a engrosar las falanges de la empleomanía militar más segura e inamovible y con ascenso a plazo fijo que se deja correr ociosamente, con retiro, pensión y otros extras".<sup>10317</sup> En efecto, acorde con ese criterio, diez años después, en 1910, se dispuso en la Ley 7850, agregar un segundo párrafo al art.23, Título 11 de las Leyes Orgánicas del Ejército y Armada, por el cual los oficiales "...que desempeñen o hayan desempeñado el puesto de Jefe de Policía de la Capital, Territorios Nacionales, o en las Provincias, se les considerará en situación de actividad, sin tener derecho de gozar de su sueldo íntegro, ni de los suplementos que hayan determinado las leyes del presupuesto".<sup>10318</sup> No faltaron entonces los oficiales retirados que pujaron para que las estipulaciones de dicha ley les fuera aplicada a ellos también.<sup>10319</sup>

La verdad amarga era que la nación argentina "...que, según el presupuesto actual (12.865.000 para 7.100 hombres efectivos) gasta 1810 pesos al año por cada uno de los soldados de su ejército permanente (3 veces más que Chile y 4 veces más que Italia) no tiene en dicho ejército permanente una base orgánica susceptible de servir de fundamento para la rápida y eficaz movilización de un poder militar".<sup>10320</sup>

Los cuadros de oficiales eran deficientes, pues como ya se había dicho al tratar del presupuesto; "...no hay escuelas de clases, las llaves maestras de las unidades; no hay oficialidad de reservistas, ni hay reservas debidamente preparadas en cantidad apreciable; la instrucción de tiro es floja y escasa, la cantidad de ciudadanos que pasa bajo banderas es irrisoria, --del último sorteo no llegarán a 3000 los que ingresen a los cuerpos, no hay pequeños campos de instrucción donde los cuerpos puedan aplicar y ampliar el aprendizaje táctico".<sup>10321</sup> En su lugar se trataba de formar "...un inmenso campo de maniobras mayor que el existente, un ostentoso Chalons en las inmediaciones de Moreno [conocido posteriormente como Campo de Mayo], perfectamente innecesario, porque para operaciones de las tres armas basta y sobra con Santa Catalina".<sup>10322</sup>

Una buena oficialidad "...es la base, la primer hilada, más aún, el cimiento del edificio. No debe flaquear ni tener falla: ilustración, pundonor, hasta orgullo de clase necesita -- alto concepto del uniforme y de su deber".<sup>10323</sup> De suerte que, una vez que el oficial se ha graduado en las aulas, "...hay que preocuparse de su actuación en el cuartel, crearle allí un ambiente de decoro, de rigidez, moral y de compañerismo y espíritu de cuerpo o clase. Salas de lectura y conversación, casinos en los cuerpos, la amistad y el celo por la carrera fomentada por todos los recursos eficaces".<sup>10324</sup> Cuatro o cinco oficiales "...aglutinados en un cuartujo es simplemente un desaseo. Es sabido cuanto el home, el médium (habitat) influye en el individuo elevando o rebajando su dignidad y el concepto de sí mismo. En Francia, Inglaterra, Alemania las clases están más dignamente alojadas que los oficiales argentinos".<sup>10325</sup>

## **N-II.- La rotación de arma como envilecedora de la calificación militar (armas, fuerzas).**

El cruzamiento de destinos y los pases de armas de los oficiales fueron tradicionales en nuestro ejército. Pero estos desplazamientos o trasiegos no obedecían a propósitos instructivos o profesionales sino más bien a profanos fines personales, oportunistas o represivos; es decir, para contrarrestar meras conspiraciones insurreccionales.

A comienzos de siglo, a juicio de Adolfo E. Dávila, el editorialista de *La Prensa*, cada oficial buscaba la ubicación "...que más le acomoda o el arma en que tenga más vacantes u horizontes más despejados, y el gobierno se encarga de legalizar la nueva situación con los nombramientos respectivos, al paladar del interesado, bien entendido, cuando median los eternos y decisivos factores político, social o de familia".<sup>10326</sup> De allí resulta que el escalafón militar "...es un verdadero caleidoscopio de colores y figuras superpuestas: es muy raro encontrar un oficial que no haya cambiado de arma, o que no sirva fuera de su arma o de su especialidad: los herreros en la carpintería y los carpinteros en las fraguas".<sup>10327</sup>

El editorialista de **La Prensa**, era muy crítico de la gestión del ingeniero Guillermo Villanueva, quien estuvo a cargo de la cartera de Guerra en la presidencia de José Evaristo Uriburu (1895-1897), "...cuando se reorganizó el estado mayor general, sin emplear un solo oficial diplomado de estado mayor".<sup>10328</sup> El propio cuerpo de ingenieros, "...no dispuso jamás de un cuadro de oficiales "ingenieros militares" y sólo por excepción tuvo alguna vez, a su frente, un jefe diplomado en la universidad".<sup>10329</sup> El mismo Instituto Geográfico Militar, anexo al estado mayor, tiene entre su personal "...elementos no diplomados, y el gobierno se ve obligado a contratar en Europa, los especialistas encargados de la principal labor".<sup>10330</sup> Y en 1903, con motivo del desastre organizacional del arma de artillería, el Diputado Alberto Capdevila interpelló al Ministro de Guerra Gral. Riccheri, pero toda su argumentación y elocuencia típica "...se estrelló contra el *parti pris* de los subordinados al régimen de la oligarquía".<sup>10331</sup>

De todos estos hechos notorios, deduce **La Prensa**: que "...estamos muy escasos de ingenieros militares, o que los existentes no son aptos para tales servicios. Felizmente, ninguna de estas circunstancias es rigurosamente exacta".<sup>10332</sup> En efecto: "...en el personal superior, hay plétora; en grados subalternos ninguno. Tenemos un general, tres coroneles, once tenientes coroneles, siete mayores, doce capitanes ingenieros y ningún teniente o subteniente".<sup>10333</sup>

Resulta así "...que nos sobran cabezas para el comando de las unidades creadas y para los demás servicios del arma: hay insuficiencia de capitanes para el mando de las diversas compañías a organizar, y, lo que es más grave, no contamos con un solo oficial subalterno para formar el cuadro de oficiales de las unidades de ingenieros creadas".<sup>10334</sup> Se trata, pues, en la opinión de **La Prensa**, "...de una enfermedad orgánica que debe curarse a la brevedad posible, a fin de evitar los cruzamientos de armas, y para que los oficiales sirvan en la suya y no salgan jamás de su escalafón".<sup>10335</sup>

Las causales de los entrecruzamientos y superposiciones son conocidas: "...pero nos limitaremos con la anotación del caso típico, absurdo y único ejemplo en el desenvolvimiento de las diversas armas".<sup>10336</sup> No necesitaba tampoco el editorialista de **La Prensa** insistir mayormente sobre "...la verdad axiomática de que los cuerpos de ingenieros deben organizarse con ingenieros militares, así como en el servicio de estado mayor no debe permitirse sino a los diplomados de dicha especialidad. Esto no se discute: el más profano en materia militar lo comprende, por aquello de cada cual a su oficio".<sup>10337</sup>

En nuestro ejército, el arma de ingenieros "...no tiene vida propia, no puede desenvolverse sola: padece de hipertrofia cerebral y tiene sus órganos de locomoción atrofiados".<sup>10338</sup> La enfermedad no era, pues, para **La Prensa**, de fácil curación: pero se apresuraba a declarar: "...estos vicios de conformación no afectan en lo más mínimo su capacidad intelectual: bien por el contrario, no estamos lejos de aceptar que la misma extralimitación de la competencia técnica tiene gran parte en el proceso del caso patológico que denunciemos".<sup>10339</sup>

Aparentemente, la competencia técnica de los ingenieros del ejército estaba fuera de discusión: "...los exámenes en la Facultad de Matemáticas y los trabajos profesionales producidos por muchos de ellos, son pruebas irrefutables. Pero el hecho, igualmente indiscutible, es que con todo esto carecemos en absoluto de oficiales subalternos para

formar los cinco batallones de ingenieros regionales, el batallón de ferrocarrileros de campaña y para los demás servicios en el Instituto Geográfico Militar”.<sup>10340</sup>

En tales condiciones, *La Prensa* creía “...que es de rigurosa necesidad hacer un llamamiento o concentración de todos los “ingenieros militares”, hoy dispersos, para encerrarlos en los múltiples servicios del arma”.<sup>10341</sup> Solamente “...para las seis unidades a crear necesitamos, por lo menos, 17 capitanes y no tenemos más que 12 en el escalafón. Hay, pues, colocación para todos los capitanes ingenieros; pero no todas las compañías de zapadores, etc., tendrán capitanes diplomados”.<sup>10342</sup>

En cuanto al comando de los batallones, “...todavía sobran 5 tenientes coroneles y un mayor. Luego, pues, el departamento de guerra no tiene sino la dificultad de la elección y es fuera de duda, si no se quiere reincidir en los errores ya intolerables de otros tiempos, se designará para dichos comandos a los diplomados de ingeniería”.<sup>10343</sup> Tendremos así, “...en cada batallón, o mejor dicho en cada compañía, una verdadera escuela de servicio de ingenieros en campaña, donde puedan formarse los que accidentalmente sirvan en el arma, mientras se encuentran otras fórmulas más modestas y eficientes para la formación del oficial de ingenieros”.<sup>10344</sup>

### **N-III.- Manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma (1904-1910).**

En un principio, los cuadros de oficiales así como las mismas unidades militares perduraban en sus lugares de destino por años. Más luego, se advirtió el peligro que esa prolongada permanencia podría acarrear para la formación de dichos oficiales y para la propia salud y modernización de las unidades, así como la fundamental necesidad de hacerlos rotar.<sup>10345</sup>

Dicha rotación o recambio y sus correspondientes pases o cambios de destino, de arma y de residencia geográfica, fue un mecanismo cada vez más asiduamente implementado por los Estados Mayores y sus incipientes aparatos de Inteligencia para contrarrestar la creciente conspiración insurreccional, y no con los fines instructivos que señalamos en un capítulo previo.

En un principio, se sostenía que dado el grado de cultura de nuestra oficialidad y la consideración que ha conquistado el oficial en la sociedad argentina, “...no es apropiado abandonarlo años enteros en regiones semi-salvajes. Un proceder semejante, solo tendría malas consecuencias y si bien es justificable en tiempo de guerra, no lo es en tiempo de paz en que solo debe recurrirse a él en caso de extrema necesidad”.<sup>10346</sup> Por las mismas razones, el Coronel Carlos R. Sarmiento recordaba que “...los Ejércitos Europeos releven continuamente los oficiales y hasta las unidades que se encuentran en el servicio colonial”.<sup>10347</sup>

Más luego, el propio General Pablo Riccheri (6-2-A), Ministro de Guerra durante la segunda presidencia de Roca (1898-1904), confiesa en un escrito fechado en octubre de 1929, redactado a solicitud del ex revolucionario radical General de Brigada Juan G. Serrato (13-3-A), que los numerosos pases o traslados de oficiales de uno a otro cuerpo fueron oportunamente hechos “...para desbaratar los movimientos revolucionarios, [y] se hicieron sin que jamás ningún oficial fuera por tales pases, dañado en ninguna forma

en su carrera”.<sup>10348</sup> Riccheri alude aquí a que dichos pases no fueron en desmedro de la antigüedad del oficial pero elude opinar en cuanto al tremendo daño que los pases de arma significaron para la instrucción y la identidad profesional de los cuadros de oficiales.<sup>10349</sup>

Tampoco menciona Riccheri el daño que dichos traslados, o nomadismos forzados, pudieron haber afectado la estabilidad familiar de los victimizados. Los procesos de adaptación a contextos geográfico-culturales diferentes, necesaria secuela de dicha forzada rotación de destinos son --para Castro Solano (2005)-- un rasgo que debe haber repercutido también en la cohesión familiar de dichos militares, tema éste que por su relevancia viene siendo tratado cada vez mas por la psicología especializada.<sup>10350</sup> Asimismo, la adaptación forzada a un arma que no fue la de su elección en el Colegio Militar, como resultado de sanciones producidas en ocasión de las sublevaciones cívico-militares, tiene que haber ocasionado también resentimientos y crisis personales e identitarias profundas.<sup>10351</sup>

Sin embargo, la rotación de mando de los jefes, teóricamente aceptable en un ejército maduro y de preparación profesional uniforme, ha sido para el caso argentino de fines del siglo XIX, según el Gral. Tomás Vallée (14-7-A), ex secretario de Guerra durante el Ministerio del Gral. Luis María Campos, “...totalmente perniciosa, por estar su ejército en plena evolución de tendencias, métodos y organización”.<sup>10352</sup> Por la forma en que han desarrollado su carrera, los jefes “...no tienen, sino por excepción, la preparación previa para instruir oficiales y la práctica necesaria para el mando de las tropas. Han llegado, en general, a los cuerpos para hacer un aprendizaje, luchando con la heterogeneidad del cuerpo de oficiales, con las dificultades de aplicación de los nuevos reglamentos y con la ausencia de exigencias concretas, hasta ahora, por parte de la superioridad para responder a los fines de su compleja misión actual”.<sup>10353</sup>

Recién cuando empiezan a orientarse y a conocer las aptitudes de sus subalternos para poder utilizarlos ampliamente, les llegaba a los Jefes “...la época del relevo, y el cambio, junto con nuevos ensayos, a veces incipientes y a menudo no concordantes con los ejercitados anteriormente, han convertido a los cuerpos en entidades estacionarias y a menudo retrógradas, por que eran así las ideas de los nuevos jefes, o por que el cuerpo de oficiales tiene dificultades para orientarse dentro de sus tendencias o para desarrollar su acción de una manera concreta y armónica”.<sup>10354</sup>

El caso repetido sin cesar y agravado por la falta de conocimiento personal del que manda y de los que obedecen, “...trae inconvenientes mayores que los que se tratan de salvar por medio de la rotación de jefes a corto término”.<sup>10355</sup> La inspección de Tomás Vallée “...creé que hay positiva ventaja en mantener en los cuerpos a los jefes reconocidamente más capaces, hasta tanto se dé al Arma una orientación definida y se afirmen sobre principios inquebrantables la preparación y conceptuación de los oficiales y el espíritu de cuerpo, casi totalmente destruido hoy”.<sup>10356</sup> Esto último “...no obstaría para que se estimulara y controlara persistentemente la preparación del resto de los jefes, agregándolos por partes a los cuerpos para asistir a los ejercicios de tiro y maniobras, y orientándolos y exigiéndoles en cualquier destino una preocupación constante sobre cuestiones del arma”.<sup>10357</sup>

El nomadismo forzado, o los cambios continuos de los oficiales de los cuerpos, a juicio de Vallée “...lesionan los fundamentos en que debe reposar una sólida instrucción. Es

muy difícil para los recién venidos conocer a sus camaradas, para desarrollar acción concurrente; conocer a las clases, para utilizarlas convenientemente y conocer a la tropa, para sacar de la instrucción individual de cada uno el mayor provecho posible”.<sup>10358</sup> Se ha dado el caso, en la Inspección de Vallée, “...de baterías que han cambiado de comandante tres veces durante el período de reclutas y que se han presentado a la inspección mandadas por Sub Tenientes recientemente egresados del Colegio Militar”.<sup>10359</sup> Desde el 1° de Febrero hasta el 1° de Julio ppdo. “...se han producido así 76 altas y bajas de oficiales durante la época más difícil de la instrucción”.<sup>10360</sup> La Inspección de Vallée creía que “...debe darse mayor estabilidad a los oficiales de los cuerpos y que no deben efectuarse cambios durante la instrucción del contingente anual. Los oficiales que empiezan con un contingente, debieran de concluir con él, y los pases necesarios deberían efectuarse inmediatamente antes de la incorporación de la clase”.<sup>10361</sup>

La escasez de oficiales en la generalidad de los cuerpos, “...recarga excesivamente el servicio y repercute muy nocivamente sobre la preparación de los oficiales y sobre la instrucción de la tropa. En ejercicios modernos, y definidamente orientados llegan a bastar dos o tres oficiales por batería, por que a más de la ventaja inicial, tienen cuadros completos de clases competentes y el personal de tropa se renueva anualmente solo por mitad o por tercios. Entre nosotros, con cuadros de clase incompletos y deficientes y con renovación total de contingente cada año, es necesario que haya siempre por lo menos cuatro oficiales por batería”.<sup>10362</sup> Vallée aporta un cuadro numérico donde se ve “...la gran desproporción que hay en la jerarquía y en el número de oficiales de unos cuerpos con relación a otros. Sumando a los cinco oficiales ausentes en Comisión los 25 que faltan para el completo de la Planta Orgánica, más 10 que representan un mínimo del 5% de enfermos y de 5% de licenciados se hace un total de 40 oficiales que faltan a los cuerpos para la instrucción”.<sup>10363</sup>

En tales condiciones y teniendo en cuenta los cambios habidos, “...es lógico que haya cuerpos que con muy escaso número de oficiales experimentados y también con muy escaso número total de oficiales, no pueden materialmente, preparar con método al cuerpo de oficiales ni dar a la tropa instrucción prolija”.<sup>10364</sup> La Inspección de Vallée sostenía, que “...los oficiales del arma cuya preparación es tan difícil y cuya cooperación en las filas es tan indispensable, no deben salir de ellas sino para destinos imprescindibles y elegidos, como el E. M., las Escuelas y las Comisiones técnicas de armamento y por tiempo limitado”.<sup>10365</sup>

#### **N-IV.- Discriminación política en las sanciones, promociones y retiros (1892-1905).**

Como lo sostiene Mann (1997), en los ejércitos modernos, los celos y los recelos se concentraban en los ascensos.<sup>10366</sup> A ello había que sumar las rivalidades políticas. El precio político-corporativo que tuvieron que pagar los oficiales insurrectos radicales aún en tiempo de los gobiernos de sus correligionarios fue muy alto. En el ejército, considerado en general, según el editorialista de *El Municipio* no existía “...la confraternidad de otros tiempos mejores en que cada jefe, cada oficial, cada soldado conservaban entre sí la distancia que la disciplina impone pero que, la abnegación y el heroísmo, se miraban como verdaderos hermanos, hijos predilectos de la más augusta de las madres: la Patria”.<sup>10367</sup> Se advertía en ese entonces en el ejército “...esa unión

forzada que produce el predominio de las disciplinas inflexibles y severas. No hay solidaridad ni comunión de sentimientos ni tendencias. Hasta el espíritu de cuerpo ha desaparecido y cada brigada, cada regimiento, cada batallón, no son ni significan otra cosa que agrupación de hombres encadenados por la ordenanza y obligados a callar y a obedecer como autómatas”.<sup>10368</sup>

La más completa anarquía minaba la existencia del ejército, y si ya no habían sucedido motines cuarteleros, era porque la anarquía “...ha llegado a tal extremo que nadie tiene confianza y los mismos soldados que se sientan cotidianamente alrededor de un fogón y se cuentan sus pesares y esperanzas, los más íntimos secretos de familia, todos sus sentimientos personales, en una palabra, se desconfían y se temen entre sí y no se atreven a hacerse unos a otros la más simple revelación que puede ser delatada a los superiores y severamente reprimida por aquellos”.<sup>10369</sup>

Se preguntaba el periodista ¿a que razones se debía este desesperante estado de cosas? Los que mandaban, “...en su afán de deprimir a la oposición y de presentarse a la expectación extranjera; de las máculas que la corrupción ha impreso en ellos, inculpan y responsabilizan de la anarquía del ejército a la Unión Cívica Radical, y especialmente a la prensa libre y honrada”.<sup>10370</sup> Ellos dicen que la propaganda demagógica de los apóstoles de la causa popular y las prédicas bastardas de la prensa independiente, son las causas originarias del lamentable estado en que se encuentra el ejército”.<sup>10371</sup> Mienten, los miserables; Los prohombres del partido principista, porta-estandartes de la cruzada regeneradora y los órganos del periodismo bien inspirado y de altas miras, heraldos de la causa de las instituciones no propagan prédicas bastardas ni doctrinas demagógicas. Su propaganda austera y patriótica, inspirada al calor de los más nobles impulsos y de los más generosos sentimientos, ha levantado el espíritu público de la abyección en que se hallaba, pero no lo ha extraviado sino que lo guía por el rumbo amplio de los deberes cívicos”.<sup>10372</sup>

Tampoco han anarquizado al ejército. Los apóstoles del partido radical y la prensa principista han predicado al ejército “...la religión del patriotismo, indicándole las cumbres del deber, pero no le han enseñado nunca a ser traidores a la constitución del estado”.<sup>10373</sup> Y lo han hecho así porque dichos apóstoles “...han tenido vergüenza y dolor al ver que los que cubrían sus pechos con la gloriosa cota del soldado argentino, sirvieran de instrumentos mecánicos de una política extraviada y criminal”.<sup>10374</sup> Habían tenido vergüenza y dolor “...que el ejército nacional, heredero de tradiciones grandes cuya sola rememoración enardece la sangre y eleva el pensamiento, se hubiera convertido en una tropa abyecta de pretorianos y cosacos. Han tenido vergüenza y dolor que nuestros bravos militares, que en cien batallas dieron lustre a la patria y escribieron con la sangre de sus venas abiertas y con los girones de su carne despedazada las páginas más sublimes de nuestra historia, fusilaron al pueblo en los comicios, haciéndose indignos de su fama y merecedores de los grilletes de los galeotes”.<sup>10375</sup>

Para *El Municipio*, los que habían anarquizado al ejército no habían sido ni los Radicales ni la prensa, sino “...los grandes delincuentes, los empedernidos pecadores, los malvados sin contrición, por así decirlo, que hayan trepado el poder público y que persisten en reconstruir el régimen nefando y canallesco que hizo pedazos el cañón del Parque”.<sup>10376</sup> Esos eran los autores y los únicos responsables de la anarquía “...que se advierte en el ejército, como son los autores y únicos responsables de todas las desgracias que afligen a la República”.<sup>10377</sup> Además, habían establecido distinciones y

preferencias odiosas, "...postergando a los militares dignos, que no se prosternan ante los césares de la Casa Rosada y que no tienen en el espinazo flexibilidades de junco, en tanto que han premiado con ascensos y puestos honoríficos a los jefes y oficiales de conciencia elástica y dúctil que no han trepado ante ningún obstáculo a fin de conseguir una posición encumbrada".<sup>10378</sup> Por eso es que se veía en las revistas y paradas militares "...a muchos asesinos laureados, cuyas charreteras despiden resplandores escarlatas porque están salpicadas con la sangre del pueblo, fusilado cobardemente en los comicios".<sup>10379</sup> No habían asistido jamás "...a ningún hecho de armas, ni a ninguna campaña guerrera a defender la integridad de la patria, pero han hecho triunfar en las elecciones a los candidatos oficiales y de ahí los galones y honores que les confieren sus amos".<sup>10380</sup>

Si bien la oficialidad radical fue reprimida, juzgada, condenada, y dada de baja en cada una de las insurrecciones acontecidas, fue asimismo y salvo algunas excepciones amnistiada y reincorporada.<sup>10381</sup> Pero dichas reincorporaciones, se administraron en cada uno de los momentos post-insurreccionales con una fuerte dosis de favoritismo y discriminación política, que se expresaba en demoras y apatías, extendiéndose este desgano incluso a los períodos posteriores a la implantación de la Ley Sáenz Peña (1912).<sup>10382</sup>

También fueron excluidos de las listas de ascenso todos aquellos oficiales jóvenes que se entrevistaban con los líderes de la oposición política, en especial con Hipólito Yrigoyen o sus adictos más cercanos.<sup>10383</sup> Sólo al final de la primera presidencia de Yrigoyen, se intentó enmendar la ingratitud mediante la ley 11.268 y su reglamentación.<sup>10384</sup> No faltaron tampoco quienes no habiendo participado de dichos eventos pretendieron falsamente acogerse a los beneficios de dicha ley.<sup>10385</sup> Al no poder frenar el ascenso de los oficiales superiores pues el filtro del embudo venía operando desde hace décadas, y al carecer de toda otra política respecto de las Fuerzas Armadas, el gobierno popular se limitó a dejar de enviar al Senado los pliegos de ascensos.<sup>10386</sup> Fueron estas discriminaciones, exclusiones, desganos o apatías en su conjunto una pieza intrínseca del **poder condicionado** que el Radicalismo heredó a partir de 1916 y que al no poder revertir o intentar hacerlo en forma muy postrera y desesperada alimentó un pretorianismo potencial que devino en el **huevo de la serpiente**.

Entre todos los oficiales insurrectos perjudicados, se destacan entre otros muchos casos específicos, aquellos que fueron sancionados y detenidos en oportunidad de acontecimientos que no figuran en los eventos amnistiados por la legislación nacional y que apenas si son mencionados por la historiografía específica.<sup>10387</sup> Este fue el caso de aquellos que fueron detenidos en los buques de guerra anclados en la rada del puerto de Zárate durante el curso del año 1892 (monitores Los Andes y El Plata) o que actuaron en la Conspiración de Santa Catalina.<sup>10388</sup> Y más específicamente, fueron los paradigmáticos casos de los Mayores Baldomero Álvarez y Amador Molina, del Teniente 2º del Batallón 9º de Infantería Mayor retirado Juan A. Cambiasso, del Mayor Emilio de Ipola (16-38-I) y del General Isidro Arroyo (16-5-I).<sup>10389</sup>

La causa de la baja del Mayor Baldomero Álvarez fue su participación en la revolución de 1893, pero al ser reincorporado "...pasó a la cola del escalafón de su grado, sufriendo por esta causa perjuicio en el ascenso que no fue más reparado".<sup>10390</sup> El documento citado también expresa que "...todos los oficiales de baja junto con el declarante en el decreto oficial, cuya copia obra a fs.4, lo fueron por ser

revolucionarios”.<sup>10391</sup> Y también el Mayor Amador Molina había sido postergado injustamente cuando ya tenía diez años en su empleo de Mayor. A pesar de haber sido propuesto en 1905 por el General Fotheringham y en 1907 por el General Saturnino E. García, Molina resolvió retirarse en el mes de noviembre de 1909, “...pero seguí prestando mis servicios como Juez de Instrucción y Jefe de Distritos Militares”.<sup>10392</sup> Los años “...que pasé de baja como consecuencia de mi intervención en los sucesos de 1893, influyeron constantemente sobre mi concepto. Y es así como con más de 35 años de servicios en la carrera militar, habiendo pasado muchos años en la campaña del Desierto y con diez años en el grado de Mayor, me ví obligado a solicitar mi pase al retiro”.<sup>10393</sup> Y ya en la ancianidad, cuando para el Mayor Molina, “...el Destino me ha deparado la felicidad de contemplar a mi país gobernado por los hombres que dignificaron mi suprema aspiración de argentino”, se dirige al Presidente Yrigoyen, para que “...contemplando el caso que planteo, les darán la justa solución que corresponde”.<sup>10394</sup>

Y en cuanto al caso del Mayor Juan A. Cambiasso, con motivo de la declaración de estado de sitio, del 2 de Abril de 1892, que provocó la abstención electoral de la Unión Cívica Radical en las elecciones que consagraron la fórmula del Acuerdo Sáenz Peña-Uriburu, el Mayor Cambiasso había sido reducido a prisión y conducido a bordo del monitor **Los Andes**, por habersele acusado de conspiración contra el gobierno constituido.<sup>10395</sup> En un camarote de dicho buque, permaneció en rigurosa incomunicación durante tres meses, desde el 8 de abril hasta el 8 de julio. Levantada la incomunicación el 8 de julio se lo pasó al monitor **El Plata**, y tres meses después, es decir el 8 de octubre, al Batallón 3° de Infantería, siempre en calidad de preso encausado.<sup>10396</sup>

Cambiasso había redactado con fecha 25 de mayo una crónica del presidio naval sufrido por los frustrados conspiradores, que recién publicó el diario **Sud América**, dirigido por José Gil, dos meses después, el 26 de Julio de 1892.<sup>10397</sup> En ella, Cambiasso confiesa que al Dr. Alem y sus amigos (Alvear, Molina, Figueroa, Torino, Castellanos), presos en la corbeta “La Argentina”, “les tiene un poco de envidia”, porque a ellos al menos “...se les permitía estar reunidos, leer, escribir y pasear sobre cubierta en fin, casi todo lo que pueden y deben permitirles. Tienen, pues mil maneras de distraer su tiempo. Pero nosotros ¿cómo podremos acortar estas larguísimas horas de completo aislamiento?”.<sup>10398</sup>

En la indagatoria sumarial con que fue interrogado, Cambiasso declaró que “...de las vejaciones y torturas a que fui sometido durante mi prisión es pálida pintura la que hizo el diario **Sud América** en el número cuyo recorte acompaño [26-VII-1892]”.<sup>10399</sup> Sin embargo, debido a la amnistía, nunca se intentó reparar el daño inferido, identificando al menos a las autoridades navales responsables de dichas vejaciones.

El proceso que se le instruyó a Cambiasso fue resuelto administrativamente a fines de Diciembre del mismo año 1892, ordenándose su baja absoluta del Ejército. En dicha resolución se condenaba el delito de opinión, pues se sostenía que “...aún cuando no hubiese estado completamente probado el delito de conspiración, la interpretación que yo daba a una **carta política** que figuraba en el proceso, acusaba el propósito de cometer faltas contrarias a la disciplina, por lo que no convenía mi permanencia en el Ejército. El gobierno de esa época, no pudiendo obtener una prueba material de mi delito político y deseando atemorizar a los oficiales, aprovechaba la interpretación que

para defenderme daba yo a esa carta, convirtiéndola así en una nueva arma contra mí”.<sup>10400</sup>

La injusta y amedrentadora resolución, así como los informes apasionados y calumniosos del comandante Armando Gordillo [26-5-I] y del Mayor Diego Saborido, fueron victoriosamente rebatidos por el Mayor Cambiasso en una “Carta abierta” que dirigió al ministro de guerra, la que habiendo sido publicada por el diario *La Prensa*, “...fue favorablemente comentada por la oficialidad del Ejército”.<sup>10401</sup> Durante el tiempo de su baja, a consecuencia de la propaganda revolucionaria que Cambiasso hacía entre los oficiales por medio de los semanarios (hoy inhallables) de su dirección *El Soldado Argentino* y *La Disciplina* y a raíz de la participación que le cupo en el movimiento revolucionario efectuado en la provincia de Buenos Aires en 1893, “...se dictó nueva orden de prisión contra mí, la que solo pude eludir emigrando a Montevideo”.<sup>10402</sup>

Al dictarse la Ley de Amnistía en 1895, Cambiasso fue reincorporado al Ejército a mediados del mismo año en el empleo de Teniente 2º, ascendió a Teniente 1º al año siguiente, a capitán en 1899, a mayor “...previo examen de competencia en la Escuela Superior de Guerra en 1906, obteniendo el número tres sobre treinta y cinco examinados”.<sup>10403</sup>

Un año después de haber ingresado a la Escuela Superior de Guerra, en 1907, y por alegados motivos de salud, de los cuales no deben haber estado exentos la derrota de la revolución de 1905, el Mayor Cambiasso solicitó y obtuvo su retiro absoluto del Ejército. En su lugar, los que fueron sus compañeros de promoción a Tenientes 2º el 16 de Agosto de 1890, “...obtuvieron el ascenso a Tenientes 1º en Octubre de 1892, quedando yo eliminado de la lista de ascensos por encontrarme preso y encausado por conspiración política. En 1895 ascendieron a capitanes, en tanto yo permanecía de baja a consecuencia del mismo hecho, de modo que al reincorporarme al Ejército a fines del mismo año, eran todos capitanes, en tanto que yo volvía a las filas en el empleo de Teniente 2º”.<sup>10404</sup>

El atraso en el ascenso ocurrido con motivo de las revoluciones de 1890 y 1893 arrastró a su vez el atraso en ascensos posteriores. Con motivo del ascenso general que se dio en 1899, Cambiasso manifiesta “...que todos mis compañeros ascendieron a mayores, correspondiéndome a mí el ascenso a capitán a causa del atraso sufrido en los dos ascensos anteriores; y cuando todos ellos recibieron el ascenso a teniente coronel en el año 1904, yo no fui ascendido ni aun a mayor por no haber vacantes para los capitanes de mi antigüedad”.<sup>10405</sup> Es, pues, para Cambiasso, evidente que el motivo de su atraso en el escalafón de la carrera con respecto a sus compañeros de promoción, se debió “...pura y exclusivamente al proceso y baja que sufrí por haber tomado parte en los preparativos revolucionarios del Partido Radical, pues de lo contrario hubiera ascendido con ellos a Teniente 1º en 1892, a capitán en 1895, a mayor en 1899 y a teniente coronel en 1904, ya que mi concepto militar no era inferior al suyo, y en cuanto a mi competencia, ella quedó demostrada por el orden de mérito que obtuve en el examen de competencia para mi ascenso a mayor, que fue, como ya lo he dicho, el número 3 sobre 35”.<sup>10406</sup>

Las leyes de amnistía, borran las penas y sus efectos, e implican, a juicio de Cambiasso “...como muy bien se expresa en el S. Decreto del 1 de junio corriente, la más amplia

rehabilitación; luego pues, es de estricta justicia reparar las consecuencias que aun estoy sufriendo a causa de mi participación en los sucesos políticos de 1892 y 1893, participación conciente y deliberada que no tuvo otro móvil que cumplir religiosamente lo que consideré un ineludible deber, atento el estado político en que se encontraba el país en esas circunstancias”.<sup>10407</sup>

Por otro lado, las mismas prácticas discriminadoras, pero de signo político inverso, son ensayadas por diferentes logias durante ambos gobiernos de Yrigoyen.<sup>10408</sup> En los años 1920 y 1921 el Coronel Froylán Leyría fue calificado apto para el ascenso, pero al año siguiente de 1922 fue descalificado por el Presidente del Consejo de Guerra General Ricardo Solá (16-3-A). Para esta operación Solá fue instado por tres subalternos suyos “...Tenientes Coroneles que siempre habían ascendido juntos y por desgracia de su arma”, y que pertenecían al “...círculo llamado *Jóvenes Turcos* [por la revolución de Kemal Atatürk], quienes tenían la ambición de ocupar altos puestos, desplazando para ascender a los camaradas más antiguos que les estorbaban”.<sup>10409</sup> Esos ambiciosos Tenientes Coroneles debían ser del arma de artillería, la misma a la cual pertenecía Solá. Escudriñando, sobre la base de Figueroa (2001), la lista de los integrantes de las promociones 16<sup>a</sup> y 17<sup>a</sup>, que pertenecían al arma de artillería, descubro entre ellos que los únicos que alcanzaron los grados de coronel y general y que pidieron el retiro en 1930, seguramente por pertenecer a la logia de los Jóvenes Turcos, fueron José Luis Maglione (16-47-A), José Efraín Belloni (17-7-A) y Estéban Badaro (16-42-A). En la segunda presidencia de Yrigoyen, entre los beneficiarios del favoritismo oficial, se encontraban el General José P. Marcilese (18-40-I), el Mayor José F. Hermida (32-51-C), el Mayor Regino P. Lascano, el Coronel Guillermo Valotta y el Teniente Coronel Armando Verdaguer.<sup>10410</sup>

Finalmente, el retiro militar no podía obtenerse “...sino después de quince años de servicios, y cualquiera que desee retirarse del ejército, tiene que solicitar su baja”.<sup>10411</sup> Con motivo de haberse pasado al retiro “...a infinidad de jefes y oficiales, ha resultado que muchos de ellos lo han sido sin sueldo porque los justificativos de los archivos no les daban los quince años de servicios, a pesar de que por referencias, se sabe que los han prestado”.<sup>10412</sup> Individuos que alegaban haber servido desde Caseros, “...resultan con menos tiempo de servicio que los ingresados después del año 80, pues descontando los años que fueron senadores y diputados a todas las legislaturas provinciales y nacionales, en que fueron edecanes de gobernador, comerciantes, etc., quedan con un saldo menor al que se requiere para el retiro con medio sueldo”.<sup>10413</sup>

El retiro y la reforma seleccionaban la oficialidad del ejército, “...pues la obligan a estudiar constantemente, y el que no se siente hábil para ello, se reforma si no tiene años para el retiro, y no permanece en las filas, como elemento perjudicial”.<sup>10414</sup> Aquel que en un concurso de competencia para el ascenso “...fracasa por dos o tres veces, es obligado a reformarse, porque se puede augurar que ya no dará mas, bajo el punto de su competencia”.<sup>10415</sup>

En cuanto a los soldados rebajados de los cuerpos, que desean ingresar en la Policía como agentes, se los rechazaba, produciendo numerosas quejas. “A los que tienen 45 años de edad no se les admite”.<sup>10416</sup> A esa misma edad, “...pasan a situación de retiro, los soldados y clases del ejército: pero éstos, entonces, por las fatigas del servicio militar —que bajo ningún motivo pueden compararse a las de los agentes del orden público— están generalmente achacosos, después de muchos años de servicios”.<sup>10417</sup>

Obtienen sus cédulas de baja, o su pase a situación de retiro, y se sabe "...que en su mayor parte tratan de ingresar a la policía. Pero estos hombres a esa edad, aún sirven, no solo para guardianes del orden, sino que acostumbrados al respeto y disciplina militar, son en su generalidad, correctos en sus procederes y elementos de confianza".<sup>10418</sup>

#### **N-V.- La segregación social de las familias de los enganchados.**

Las familias de los enganchados de algunos regimientos eran perfectamente tratadas, vivían dentro del cuartel y hasta en algunos casos se les brindaba a sus hijos educación primaria.<sup>10419</sup> En otras unidades, se buscaba disminuir el número de mujeres cuarteleras y en otras eran simplemente abandonadas por sus autoridades.<sup>10420</sup> Y en otras, sólo se racionaba a las familias de los soldados de línea.<sup>10421</sup>

Se objetará, sostenía J. J. Biedma (el autor de "Crónicas militares. Antecedentes históricos sobre la campaña contra los indios", Buenos Aires, 1924 y 1931), que el concubinato "...es inmoral dentro del cuartel o que cada cuerpo tiene determinado número de familias?. Pero eso no justificaba la iniquidad que se hacía con ellas".<sup>10422</sup> La tropa enganchada en el 4 de Infantería, cuyo cuartel en el acantonamiento de Santa Catalina se derrumbó el 19 de diciembre de 1895, se la trajo a los cuarteles de Palermo, conjuntamente con sus respectivas familias.<sup>10423</sup> Biedma se preguntaba "...¿porqué se las arroja ahora de manera tan cruel como brutal?...literalmente a la calle, más precisamente...a la denominada calle Brasil, costado sur del cuartel que ocupaban los batallones 11 y 4 de infantería, a espaldas del arsenal de guerra, donde existía un terreno baldío que debía ser propiedad fiscal porque allí estaban los depósitos del arsenal de guerra".<sup>10424</sup>

En dicho terreno se levantaban, a tres metros de la vía del tranvía, en enero de 1896, numerosas carpas "...improvisadas con trozos de arpillera, lona vieja, mantas, colchas, y cuanto pedazo de tela es capaz de impedir, aunque sea débilmente, los efectos de la acción solar".<sup>10425</sup> Vivían bajo y alrededor de esas carpas, varias familias del batallón 4 de infantería de línea, "...en hacinamiento inmoral de mujeres harapientas, niñas y niños, madres, esposas e hijas de soldados de ese batallón, que han sido brutalmente abandonadas por el jefe del cuerpo, obligándolas a amontonarse allí, ofreciendo un espectáculo vergonzoso al transeúnte, que siente al contemplarlo, subir a su mejillas el calor que produce la vergüenza".<sup>10426</sup> Dentro de las estrechas carpas, se notaba un mundo de utensilios "...de uso tan indispensable como común, y fuera de ellas abundan, desparramados sin orden, todos aquellos que por su volumen no tienen cabida bajo el improvisado techo: camas de hierro, catres, baúles, enseres de cocina, cajones, etc".<sup>10427</sup>

Interpelados por J. J. Biedma, un ocasional transeúnte, dichas infortunadas le contestaron: "Señor, nosotras no tenemos la culpa de lo que pasa, somos familias del 4 de línea y el Comandante Mombello nos ha arrojado del cuartel con lo puesto y nos obliga a permanecer aquí, rodeadas de miseria, haciendo vida íntima en medio de la calle, soportando a la intemperie estos horribles calores, aguantando la lluvia, revolcándonos entre el barro o ahogándonos con el polvo cuando no llueve".<sup>10428</sup> Cuando vinimos de Santa Catalina, señor, se nos dio por alojamiento en Palermo unos galpones en que siquiera, estábamos bajo de techo; pero así que vinimos a este cuartel, fuimos arrojados a la calle y así estamos desde el lunes de la semana pasada. Vimos al coronel [Manuel] Fernández Oro, les referimos nuestras penurias y nos ofreció hacer en

nuestro obsequio cuanto pudiera, pero no ha de haber podido hacer nada porque dicen que los jefes de regimiento son un cero a la izquierda”.<sup>10429</sup>

Y concluían esas pobres cuarteras, “...ahí nos tiene Señor,...miserables, maltratadas, viviendo peor que animales irracionales, negándose hasta la ración que el gobierno acuerda a las familias del soldado, a las mujeres que acompañan al defensor de la patria en todos sus trabajos, en sus infortunios y llegando hasta los campos de batalla a socorrer heridos y recoger muertos, compartiendo peligros y penalidades, sin la esperanza de la recompensa a que no aspiran en su humildad inalterable”.<sup>10430</sup> Muchas de dichas mujeres dijeron haber pretendido, “...dinero en mano, alquilar un miserable cuarto, pero han sido arrojadas al saber los locatarios que...¡que eran mujeres de soldados!”.<sup>10431</sup>

## **N-VI.- Conclusiones.**

Al no poder el orden burocrático-oligárquico perpetuar más sus estructuras y dispositivos de dominación civil y militar, ensayó también operaciones de deformación endógena destinadas a devaluar y desarmar la moral de los disidentes de la institución armada. En esa tarea deformadora y pretoriana los gobiernos apelaron a una gruesa batería de manipulaciones administrativas entre las cuales se encontraban la rotación de arma, la manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma, y la discriminación política en las prisiones, promociones y ascensos.

## **Capítulo IV-D-15                      Construcción del enemigo interno durante la Paz Armada**

### **Índice del Capítulo IV-D-15**

- O.- Construcción del enemigo interno durante la Paz Armada
  - O-I.- Fractura militar y espionaje contra-revolucionario (1892)
  - O-II.- Inteligencia militar interna en instancias revolucionarias (1904-1932)
  - O-III.- Delaciones e imprudencias culpables de los fracasos revolucionarios (1890-1904).
  - O-IV.- Intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios (1905).
  - O-V.- Ausentismo del lugar de destino como desertión y traición (1905).
  - O-VI.- Fabricación de sumarios fraguados (1905).
  - O-VII.- Conclusiones.

### **Palabras Claves**

Ausentismo represivo como traición—contexto pretoriano--Delaciones e imprudencias culpables del fracaso conspirativo--Discriminación política en las promociones y ascensos-- Enemigo interno--Fabricación de sumarios fraguados--Fractura militar y espionaje contra-revolucionario--Inteligencia Militar--Intrigas, recelos y arrestos pos-

revolucionarios—Logias--Manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma—Paz armada--Poder condicionado—

## **Keywords**

Armed peace--Political discrimination in military promotions—internal enemy--military cleavages--counter-revolutionary espionage--military intelligence--political manipulation of destination changes—praetorian context.

## **O.- Construcción del Enemigo Interno en un contexto Pretoriano de Paz Armada**

Es preciso también plantear el problema de cuáles dispositivos fueron implementados para sostener un orden político pretoriano en el contexto de una paz o diplomacia armada, implementada con las naciones vecinas (Chile, Brasil).<sup>10432</sup> Para revertir el clima de indisciplina generalizado provocado por las insurrecciones cívico-militares y reactualizar la cuestión del orden pretoriano, los niveles superiores del establishment político-militar acudieron en forma reiterada a viejos dispositivos de inteligencia, con los cuales identificar e interiorizar al enemigo endógeno o interno. Estos dispositivos fueron rescatados del arsenal instrumental de la primer crisis de la modernidad (Rosismo), que con el correr del siglo XX se fueron sofisticando e independizando cada vez más, primero en la denominada policía política, y más luego en lo que se dio en llamar la Sección Especial.<sup>10433</sup>

Debemos aclarar que por enemigo interno no debe entenderse el de Enemigo Interior, categoría ésta que se refiere al de un enemigo geográficamente ubicado y que lucha por reivindicaciones localistas, cual fue en su momento el Jordanismo, ubicado exclusivamente en la provincia de Entre Ríos; y luego el Tejedorismo, en la provincia de Buenos Aires. Por enemigo interno se debe entender el que impugna un régimen al que caracteriza como ilegítimo.<sup>10434</sup> Y por Paz Armada debemos entender, a semejanza de Europa Occidental, la carrera armamentista iniciada entre las naciones Latinoamericanas a partir del triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico (1879). A esto debemos agregar los enormes medios bélicos en materia de cañones, ametralladoras, acorazados y buques torpederos que llenaban los arsenales y flotas de mar. Como este material bélico debía ser renovado y actualizado permanentemente, es dable comprender que significara una sangría presupuestaria alarmante.

El comportamiento de los cuerpos de oficiales en la Argentina finisecular osciló entre el compromiso republicano con la defensa del pueblo y del derecho y la moral públicas, y el compromiso corporativo y venal con la obediencia a los mandos y a la disciplina militar del orden burocrático-oligárquico. Es así entonces, que a partir de 1890, cuando militarmente prevaleció la fidelidad al poder político legal de dicho orden, las promociones, los ascensos y los destinos dejaron de regirse por los criterios tradicionales (antigüedad), los meritocráticos (orden de mérito en el Colegio Militar, méritos de guerra), o los específicos-técnicos de cada arma, y pasaron a ser escudriñados por una incipiente Inteligencia Militar y evaluados por el grado de lealtad a la autoridad del estado y su subordinación a los mandos.<sup>10435</sup> En cuanto a ascensos, pases, destinos y cambios de arma es sabido que la Inspección General propone, pero es el Estado Mayor quien dispone.<sup>10436</sup>

Este último y décimo-quinto capítulo lo dividiremos a su vez en siete apartados tomando en consideración primero la fractura militar producida por la Revolución del 90 y el espionaje contra-revolucionario implementado (1892); continuando con la inteligencia militar interna durante instancias revolucionarias (1904-1932); y de un análisis de las delaciones e imprudencias culpables de los fracasos revolucionarios (1890-1904); seguido luego por un pormenorizado estudio de las intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios (1905); y finalmente, intentaremos el tratamiento del ausentismo del lugar de destino como deserción y traición (1905); y una indagación de la fabricación de sumarios fraguados (1905).

### **O-I.- Fractura Militar y Espionaje Contra-revolucionario (1892)**

En oportunidad de producirse la crisis del orden oligárquico --origen mediato de los sucedáneos órdenes pretoriano y populista-- y por consiguiente haberse concertado numerosas reuniones de naturaleza conspirativa, era común que sus protagonistas se encontraran con elementos infiltrados, trabajando al servicio de incipientes servicios de Inteligencia militar.<sup>10437</sup>

Después de estar el Mayor Amador Molina algunos meses en el campamento de Palermo (Buenos Aires) se le presentó un día del mes de Agosto de 1892 el entonces Mayor Diego Lamas, oriental famoso por su actuación en la revolución del Parque en Julio de 1890 y por su posterior gesta revolucionaria en tierra Uruguaya en combinación con Aparicio Saravia (1897), quien le manifestó "...que se debía apurar la organización de los que estábamos comprometidos en el movimiento y la forma en que se debían sacar los Cuerpos".<sup>10438</sup>

No debemos olvidar que para esa fecha, agosto de 1892, la fórmula del Acuerdo (Sáenz Peña-Uriburu) ya estaba convalidada, pues el Colegio Electoral se había reunido el 12 de Junio de ese año. Con respecto a Molina, al cuerpo y a los oficiales del Batallón que lo acompañaban, había quedado todo perfectamente concertado. Pero el Mayor Lamas insólitamente y contrariando las prácticas conspirativas le habría manifestado a Molina, que debía "...ir a la Capital a casa del Señor Coronel D. Martín Irigoyen a ratificar mi adhesión al partido radical y firmar el libro que se llevaba al efecto".<sup>10439</sup> Molina le manifestó que iría el otro día y efectivamente "...pedí permiso y me fui. Encontré al Mayor Lamas en la esquina de Callao y Rivadavia [Buenos Aires] y me dijo que ¿cómo venía vestido de militar; le dije nadie nos ve y sobre todo no tengo miedo, fui y me encontré con el Coronel con quien he tenido muy buenas relaciones y cuando me presentó el libro para firmar allí estaba presente el actual Sr. Presidente de la Nación [Yrigoyen], quien tal vez se recuerde esta circunstancia, al firmar vi que lo hacía a continuación de las firmas del Señor General Teodoro García y Coronel D. Ramón Bravo, en seguida me marché al campamento sin novedad alguna".<sup>10440</sup>

Al mes siguiente, el 19 de septiembre de 1892, el Capitán D. Eduardo E. Conesa (hijo del General Emilio Conesa, veterano de la Guerra del Paraguay), del 10 de Infantería, invitó a Molina a una reunión que tenía "...en el cuartel de Ingenieros para comprometer a los Tenientes Eduardo Gallino y José Zorzano del 4 de Infantería".<sup>10441</sup> Sorprendido Molina por la catadura de los nuevos conspiradores, le manifestó a Conesa que "...si la reunión era para eso yo no asistía y lo dije en estos términos: "Como se pone Ud. a comprometer a dos oficiales borrachos consuetudinarios, que a lo mejor nos

denuncian y se acabó todo el trabajo de tanto tiempo”.<sup>10442</sup> A las observaciones críticas, Conesa dijo que no, “...que yo como vecino del cuartel del 4 me encargaría en el momento oportuno de dichos oficiales y así quedé comprometido a eliminarlos o a que me siguieran”.<sup>10443</sup> Efectivamente, como luego se verá, dichos oficiales delataron la conspiración que se tramaba. Esto nos revela las características improvisadas, informales y expeditivas de las conspiraciones militares.

## O-II.- Inteligencia militar interna en instancias revolucionarias (1904-1932)

La inteligencia política requiere --a juicio de Maquiavelo-- un conocimiento del saber político del adversario.<sup>10444</sup> El temor al copamiento de unidades militares por parte de los oficiales revolucionarios hacía que se desplegara toda una batería de medidas preventivas. En vísperas de un conato sedicioso ocurrido en 1904, el Sub-teniente Manuel Estol (24-41-I), destinado en San Luis, y arrestado en la guarnición, le informa a su padre que “...hay unas alarmas terribles. La guardia, que en tiempos normales, consta de 8 hombres, en llegando la noche se aumenta a 28. Quien sabe si no aumentará más. El cuartel completamente a oscuras, los oficiales solo pueden salir hasta las 10 de la noche, durante ésta todo carreras y se detiene y reconoce a cuanto bicho acierta a pasar cerca. Se colocan centinelas con las armas cargadas, por todas partes y asómbrese de esto: el Mayor duerme en el cuartel con un fusil y un montón de tiros en la cabecera. La comida la hace traer de su casa y entre la tropa, tiene infinidad de espías. Lo único que falta es que durante nuestro sueño nos coloquen un centinela a la puerta. Solo Dios sabe si esto también no lo hacen”.<sup>10445</sup> Al año siguiente, en ocasión de la Revolución de Febrero de 1905 en la Capital, los conjurados para la toma del Arsenal fueron traicionados y apresados uno por uno “...repitiéndoseles al oído el propio santo y seña”.<sup>10446</sup>

Casi treinta años después, en 1932 y 1933, son muy numerosos los casos de sedición y conspiración contra los gobiernos de Uriburu y de Justo descubiertos y sumariados.<sup>10447</sup> En junio de 1932, según un Resumen del Noticioso Informativo remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería Teniente Coronel Martín Gras (28-6-C), “...la campaña en Corrientes a favor de una revolución para derrocar las autoridades constituidas está alcanzando una virulencia extraordinaria”.<sup>10448</sup> El Comandante Gras creía “...conveniente se efectúe una investigación a fondo para procurar hacer abortar la rebelión en perspectiva”.<sup>10449</sup> Según dicho Comandante, se conspiraba abiertamente en el Salto [Uruguay] y en Concordia [Entre Ríos]. Entre los que allí conspiraban estaban “...el Doctor Bulnes, un ingeniero Jurado, Agripino Méndez director del diario ***El Amigo del Pueblo***, cuyos recortes se acompañan, Jacobo Lilberman Director de ***El Herald***, algunos de cuyos artículos también se remiten y otros mas”.<sup>10450</sup> Según Gras, el 22 de Junio de 1932 el Mayor Jacobo Parravicini (37-36-G) entregó a la policía “...un sujeto que se detuvo por estar tratando de comprometer a un suboficial del Regimiento 6 de Caballería para que tomase parte en la revolución. Sus declaraciones pueden ser muy útiles para la pesquisa, pero todo depende de la habilidad con que proceda y del interés que se tome la policía local”.<sup>10451</sup>

Existía entonces casi la seguridad de que “...varios de los Oficiales que intervinieron en la revolución de Corrientes vienen con frecuencia a esta ciudad, pero para detenerlos el Jefe de Policía dice que necesita la orden de captura y la filiación. Este funcionario me ha comunicado ayer que cree que el General Mosconi ha estado días pasados en esta

ciudad, pero con nombre supuesto e ignorándose su alojamiento”.<sup>10452</sup> En los prostíbulos “...es donde más propaganda se hace entre los soldados, asegurándose que se les dice entre otras cosas: “ya saben muchachos, en caso de bochinche **Viva Pomar**”.<sup>10453</sup> Esta era la consigna entre los conspiradores radicales para identificarse mutuamente.

El Gerente del Banco de la Nación le había comunicado al Tte. Cnel. Martín Gras (28-6) “...en forma confidencial, la noticia de que “...un personalista [Yrigoyenista] de influencia ha dicho que pronto se alterará el orden, siendo muy probable que se lleve un golpe de mano contra el Banco de Concordia y tal vez los de Federación y Chajarí [Entre Ríos]. Pomar está alojado con su señora en la estancia de Fonseca pero de vez en cuando realiza viajes al Salto [Uruguay] donde se encuentra con los Kennedy [Eduardo, Roberto y Mario] que tienen casa instalada en esa ciudad. También en dicha casa se realizan reuniones casi todas las noches siendo evidente un amplio intercambio entre los exilados argentinos y los políticos Concordeños de tendencia personalista [Yrigoyenista]”.<sup>10454</sup> A la casa donde se efectúan estas reuniones la llamaban en el Salto “...la casa de los argentinos y está administrada por el ex auxiliar de aprovisionamiento Santillán que se sublevó en Enero. En el Salto hay gran actividad y según informa el Cónsul argentino en esa ciudad, por todas partes se dice que un movimiento revolucionario es inminente en Concordia”.<sup>10455</sup> La opinión de un uruguayo, el General Bravo, “...es que efectivamente se conspira decididamente en la ciudad oriental [Salto]. Sigue teniendo la convicción el referido general uruguayo de que en la Isla del Zapallo y Rica [Uruguay] existen armas escondidas, lo que ya se comunicó en noticioso 32/34 del 5 de febrero”.<sup>10456</sup>

Por otra parte, y en forma confidencial, el oriental General Bravo en abierto colaboracionismo con la represión en Argentina le hizo llegar al Tte. Cnel. Gras la noticia “...de que por ciertos datos que le merecen fé, el Jefe de Policía de Concordia no le merece confianza”.<sup>10457</sup> Hacia el Salto “...están afluyendo ahora numerosos exilados argentinos que estaban domiciliados en otra parte del vecino país. Desde Concordia pasan también a la vecina orilla numerosos conspiradores para asistir a las reuniones antedichas. El domingo 19 por la mañana y el miércoles 22 se han efectuado las dos últimas reuniones. En la tarde de este último día regresaron a Concordia en las últimas lanchas, 28 personalidades de los de más arrastre, los cuales habían concurrido a dicha reunión”.<sup>10458</sup> El éxito de las conspiraciones se fundaba en la sorpresa y la simultaneidad de las acciones.

Se cree que para la dirección de la propaganda revolucionaria “...a desarrollarse en Concordia ha sido designado un tal Goyeneche que fue Jefe de Policía de Rosario [Santa Fe]. Sin embargo, hay muchos más empeñados en esas tareas propagandistas pudiendo citarse entre éstos a los periodistas Agripino Méndez y Jacobo Lilberman, el primero de los cuales ha asistido a las dos últimas reuniones del Salto, habiendo intensificado su campaña revolucionaria como puede verse por los recortes adjuntos”.<sup>10459</sup>

Otro periodista que ha asistido a esas reuniones en la casa de los argentinos, es el corresponsal de ***Crítica*** César D. Candal “...enviado especialmente con motivo de las fiestas del centenario. No se sabe si ha ido como revolucionario o como simple ***reporter***; pero lo que le ha declarado el Intendente de Concordia en forma confidencial es que procuró reportear a los exilados argentinos. Que Pomar se encuentra hermético,

pero que entusiasmados los ánimos por el activo cambio de ideas, confesó que con 100 hombres se comprometía a tomar los cuarteles de esta ciudad”.<sup>10460</sup>

Con respecto al Mayor S/R Regino P. Lescano, quien actuaba bajo las órdenes del Teniente Coronel Atilio Cattaneo, y ambos bajo el liderazgo político-espiritual del escritor Ricardo Rojas, “...se lo vió pasar al Salto el 8 del corriente acompañado por el Doctor Bulnes con quien ya se lo vio vez pasada en Concordia”.<sup>10461</sup> Como es sabido, Lescano terminó asesinado en Curuzú Cuatiá en un confuso episodio.<sup>10462</sup> En el momento de cerrar el noticioso informativo el Cónsul Argentino en el Salto le informa al Teniente Coronel Martín Gras “...que ha cruzado para Concordia un ex cabo González Sosa, sujeto peligroso que tal vez traiga mensajes para los suboficiales de aquí. He ordenado a la subprefectura se lo detenga hasta tanto reciba telegráficamente de esa División los datos solicitados por radio”.<sup>10463</sup>

### O-III.- Delaciones e imprudencias culpables de los fracasos revolucionarios (1890-1904).

En el campo moral la desorganización del ejército argentino como consecuencia de la Revolución del 90 se “...troca en vergüenza”.<sup>10464</sup> El ejército argentino “...está bajo el imperio del espionaje y de la inquisición. No hay patriotismo, ni ciencia, ni buena conducta, ni dignidad que sirvan para salvar de las persecuciones al oficial que carezca de simpatías políticas para con los mandones. Una sospecha, una delación calumniosa, un chisme, basta para que el oficial más ilustrado y leal sea condenado a la tortura moral y física en algún buque de guerra”.<sup>10465</sup>

En su afán por obedecer ciegamente al general Roca, transformando poco a poco al ejército en guardia pretoriana, el Ministro de Guerra Gral. Nicolás Levalle “...ha pisoteado todas las leyes militares, echó al olvido las ordenanzas y los preceptos de la justicia, desconoció el mérito de la inteligencia hermanada con el estudio, y no está lejos el día en que los batallones no tendrán un solo oficial capaz de resolver una simple ecuación algebraica o de ejecutar un plano topográfico por mas sencillo que fuese, pues no se concibe que un oficial medianamente ilustrado siga prestando sus servicios en un cuerpo fuera de la ley y desprovisto del carácter de defensor de las instituciones y libertades nacionales”.<sup>10466</sup>

El general Levalle o Levaggi era, para Deolindo Muñoz, director de *El Municipio* (Rosario), “...la más genuina personificación del sistema juari-roquista aplicado al ejército”.<sup>10467</sup> Rebajar la moral de las tropas, “...tachar de opositores al gobierno a todos los oficiales que saben comprender quien es el soberano de una república y que deberes incumben a todo militar que quiera conservar su título de ciudadano argentino; corromper y desorganizar; he ahí los medios de que se valen ciertos ministros para asegurarse la adhesión de las tropas y el auxilio de los remington en los días de las elecciones”.<sup>10468</sup>

Las sospechas fundadas en delaciones y traiciones fueron siempre la fuente en la que abrevaron quienes han tenido la responsabilidad de frustrar conjuras, conspiraciones y motines. Con motivo de la conspiración de Julio de 1890, diversos autores han revelado que fue el Mayor Manuel Palma (quien había sido contactado por el Mayor Felipe Vázquez y el Mayor Garaita), el que delató la presencia del General Manuel J. Campos

al frente de la Junta Militar revolucionaria, motivo por el cual fue arrestado días antes de desatarse la rebelión.<sup>10469</sup>

Dos años después, en septiembre de 1892, cuando se desencadenó la Conspiración de Santa Catalina (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires), fueron los Tenientes Eduardo Gallino y José Zorzano –invitados ingenuamente por el Capitán Eduardo E. Conesa-- los que la delataron. El Mayor Amador Molina (revolucionario) relata que “...cual no sería mi sorpresa al encontrarme con Gallino y Zorzano, al verlos no me arrimé, pero ya me habían visto, yo me retiré al cuartel del 7 de Caballería mientras estaban en la conferencia y conversaban sobre el mismo asunto con el Capitán Francisco Villarino [12-23-C] (hoy Coronel)”.<sup>10470</sup> Todos los conspiradores se retiraron el día 20 de septiembre a los cuarteles “...y los citados Gallino y Zorzano se apartaron de nosotros y tomaron otro camino, entraron a una carpa donde se vendía alcohol y otras mercaderías que pertenecía a una señora llamada Pepa, esta misma señora nos manifestó después que los citados oficiales después de haberse puesto ebrios se sortearon a ver quien le tocaba hacer la denuncia, ésta le cayó en suerte a Gallino, salieron de ahí y se fueron a ver al Comandante [Alejandro] Azopardo Jefe del Batallón 4 y éste al Jefe de Estado Mayor Coronel Jorge Reyes y éste a su vez al Jefe de la División General Nicolás H. Palacios”.<sup>10471</sup>

El mayor Amador Molina continúa rememorando que el General Nicolás Palacios, comandante del campamento de Santa Catalina, en conocimiento de lo que se tramaba, “...fue personalmente a cada cuerpo donde había los oficiales comprometidos según la lista presentada por Gallino, me sorprendió que el Oficial de Servicio fuera a mi cama y me dijera que me llamaba el Jefe de mi Batallón Comandante José A. Espeche (Leg.4210), me vestí y me puse la espada y me presenté al Comandante”.<sup>10472</sup> Una vez en su despacho, éste me dijo: “...preséntese al General el cual me ordenó entregar la espada a mi Jefe y quedaba preso e incomunicado, lo mismo hizo con cinco o seis oficiales mas del Batallón y siguió a los otros Cuerpos, esa noche llovía torrencialmente y a todos nos pusieron parados en medio de la calle con un centinela cada uno, después de una hora de estar allí completamente mojados nos hicieron ir a nuestros alojamientos al otro día nos llevaron al Detall y allí en carpas de tropa fuimos puestos incomunicados a disposición del Juez de Instrucción, Comandante Eduardo H. Ruiz (2-12-I), que nombró el General Palacios para que levantara el sumario”.<sup>10473</sup> Finalmente, cuando se les tomó declaración “...se levantó la incomunicación y quedamos detenidos allí hasta que el 24 de Diciembre se apersonó a todos los presos el Comandante Ruiz, comunicándonos que la Superioridad nos daba de baja por resolución administrativa”.<sup>10474</sup> Después de haber sido dado de baja, Molina se fue a Mendoza, su provincia natal, donde finalmente tras largas gestiones donde intervino Bernardo de Irigoyen fue incorporado a las filas como Juez Instructor por el General Fotheringham.<sup>10475</sup>

En cuanto a la conspiración ocurrida en septiembre de 1904, en San Luis, contra la segunda presidencia de Julio A. Roca, se suscitaron numerosas y complejas situaciones que dieron lugar a sumarios y epistolarios periodísticos, que se sucedieron hasta quince años posteriores al acontecimiento revolucionario. Encontrándose el Mayor Juan A. Iturralde [14-28-C] en la ciudad de San Luis, con motivo de la Intervención Nacional (1904), había comunicado al Gral. Fotheringham que tenía “...vehementes sospechas que el Jefe de su cuerpo, Teniente Coronel Benjamín Calvete [6-16-I] y los oficiales ya expresados conspiraban”.<sup>10476</sup> Sus sospechas se fundaban en las denuncias recibidas por

parte de profesionales del cuerpo.<sup>10477</sup> El médico de la brigada Dr. Alejandro Marcó, en uno de los primeros días de julio de 1904, le transmitió a Iturralde que "...tenía algo grave que manifestarle, que no podía callarlo porque era su amigo y que sería una picardía hacerlo que en este caso el no podía guardar reserva: que era necesario que el declarante se cuidara, que se trataba de eliminarlo, según le había manifestado personal y reservadamente el Tte. 2º Domingo Tello, por considerarlo al declarante un obstáculo para que el cuerpo tomase parte en un movimiento subversivo que debía estallar de un momento a otro,....".<sup>10478</sup>

Amén de denuncias formales, también se dieron situaciones donde ciertas actitudes seductoras despertaron naturales suspicacias. Habiéndose presentado al cuerpo el Tte. 1º Álvaro Ravagnan, que se encontraba ausente como Secretario de la Junta de Excepciones de Villa María, y como este oficial pertenecía a la Compañía del Cap. Daniel Aranzadi [16-29-I], el Mayor Iturralde lo habló, "...tratando de sondearlo para conocer lo que él sabía y sus tendencias o intenciones".<sup>10479</sup> El Tte. 1º Álvaro Ravagnan le manifestó que "...a él no lo habían hablado para tomar parte en ningún movimiento, pero que le había llamado la atención la obsequiosidad con que lo habían recibido el Cap. Aranzadi y el Tte. [Luis] Bruce [20-43-I], sin haber tenido nunca intimidad con ellos: Que el Tte Bruce le ofreció que fuera a vivir a su cuarto con él, ofrecimiento que Ravagnan aceptó, que creía que Aranzadi y Bruce trataban de atraerlo con sus atenciones, que creía que tenían la intención de hablarle de algo, pero que parecía que hasta ese momento no se había resuelto a hacerlo; que perdiese cuidado, que si lo hablaban para tomar parte en algún movimiento él no los seguiría y que el Cap. Aranzadi no sacaría la Cía".<sup>10480</sup>

Cabe aclarar que en aquel tiempo los regimientos carecían de casinos y/o barrios de oficiales.<sup>10481</sup> Los oficiales vivían apiñados en los cuarteles conviviendo de a dos o de a cuatro en una misma habitación. Recién luego de la implantación del Servicio Militar Obligatorio, y debido a la prédica de *El Diario*, se pudo comenzar a remontar la promiscuidad en los cuarteles.<sup>10482</sup> Ravagnan había creído también que el Cap. Aranzadi "...se encontraba enfermo o convaleciente en Buenos Aires, en virtud de lo que antecede, y que no obstante ello el Cap. vino a Río Cuarto el 7 o 8 de Septiembre último de incógnito, vestido de particular, con un traje desaseado, con un sombrero chambergo en mal estado de conservación y una balija muy deteriorada. Que esto lo sabe por el dueño del Hotel Andino, situado frente a la estación, hotel donde se alojó el Capitán, y por el cochero de este pueblo Nicasio Molina, que manifiesta haberle llevado dos veces a la estancia de Don Pedro Vargas".<sup>10483</sup>

En otros casos, el indicador de situaciones irregulares era la indumentaria utilizada, y los modos de anunciarse y presentarse. El Mayor Iturralde creía que el Cap Daniel Aranzadi "...andaba en malos pasos por el modo que vestía, porque cree que no se ha presentado a quien correspondía en este punto, porque deseaba no andar en las calles centrales para no hacer ver, según se lo ha manifestado al declarante el cochero, porque no ha ido al cuartel del batallón del declarante y porque ha preferido llamar por carta al Tte. Bruce, sin dar mi nombre al mensajero, como consta por la declaración escrita hecha ante testigos por el menor Gregorio Carranza".<sup>10484</sup>

Otras actitudes de orden personal y casual como el estado de ánimo de jefes y oficiales superiores aún en sus encuentros en domicilios particulares revelaron situaciones políticas de alto riesgo. Preguntado a su vez, en relación a esta situación, el Subteniente

Arturo Capurro Robles si el Subteniente Armando Gordillo [26-5-I] ha comido alguna vez con el Cnel. Benjamín Calvete (6-16-I), en su casa particular y algún otro oficial y explique que le ocurrió al Coronel con motivo de la visita del Tte. Anselmo Juanto, dijo que "...en los últimos días del mes de IX invitado por el Coronel, fueron a comer con él en su casa el declarante y el subtte, [Armando] Gordillo en la mesa el Coronel estaba expansivo, de buen humor. Conversador, les hizo conocer unos telegramas que había recibido con motivo de su ascenso, en ese momento llamaron a la puerta salió un chiquilín hijo del Coronel, a ver quien llamaba, enseguida salió el Coronel a hablar con la persona que había llegado, que fue el Tte. Juanto según supo el declarante después por el Subtte. Gordillo, que lo había reconocido por la voz, que el Coronel estuvo con el Tte. Juanto en la puerta de cinco a diez minutos y volvió al comedor, no habiendo notado el declarante en ese momento que hubiese cambiado la disposición de ánimo del Cnel., que después de tomar el café los invitó a pasar a la sala, que entonces notó el declarante un cambio visible en el estado de ánimo del Cnel., no conversaba, fue por esto que el declarante se retiró poco después con el Subtte. Gordillo al cuartel. Que en el camino el declarante preguntó al Subtte Gordillo, que le había pasado al Cnel que había ocasionado el cambio que había notado. El Subtte Gordillo, manifestó que probablemente el origen o motivo del cambio debía ser la conversación que había tenido con el expresado Tte. Juanto".<sup>10485</sup>

Preguntado a su vez el Subteniente Armando Gordillo, dijo que "...del 28 de septiembre al 2 de octubre el declarante y el Subtte Capurro Robles fueron por invitación del Coronel a comer con él a su casa, que en la mesa, el Coronel estaba de buen humor, expansivo, que les mostró varios telegramas recibidos con motivo de su ascenso, que en ese momento se presentó el Tte. Juanto a la puerta de calle de la casa, un chiquilín hijo del Cnel, salió a ver quien era, invitó al Teniente a pasar adelante, el Teniente no lo hizo así, pero como por su voz que se sentía bien distintamente en el comedor, el Coronel le reconoció se levantó inmediatamente y salió a recibirle permaneciendo con el Tte en la puerta de la casa, de 5 a 10 minutos, regresando al comedor completamente cambiado, en cuanto a la disposición de su espíritu: estaba visiblemente contrariado, mal humor, no hablaba, contestaba con medias palabras, enseguida de tomar el café los invitó a pasar a la sala y como esta situación un poco violenta para los visitantes se prolongaba, el declarante y el Tte Capurro Robles, se retiraron".<sup>10486</sup>

Frustrada la trama conspirativa, el Coronel Calvete fue esa noche al cuartel "...y estuvo con el Mayor en el cuarto de éste. Y el Subteniente Armando Gordillo refirió al Mayor Iturralde lo que les había pasado en el domicilio del Coronel".<sup>10487</sup> Preguntado entonces Gordillo a que atribuía el cambio "...manifestó que notó en el ánimo del Cnel. Calvete en la noche que deja mencionada. Dijo que desde un principio han atribuido esto a que el Tte. Juanto debía haber ido a comunicarle al Cnel que en el cuartel se tomaban medidas de seguridad, ordenadas por el Mayor segundo Jefe del Batallón [Iturralde] porque efectivamente era así".<sup>10488</sup>

El cambio de ánimo del Coronel Calvete debe haber obedecido a que con motivo del eventual fiasco conspirativo, le vino súbitamente al recuerdo la desgracia que le ocurrió a su padre treinta años atrás con motivo de la derrota de La Verde (1874), donde fue ultimado. Por otro lado, se ignora en que grado Calvete estaba al tanto de lo que le ocurría a la conspiración en otros confines, tales como Córdoba, Bahía Blanca y Rosario, donde el Mayor Daniel Fernández, el Teniente Coronel José M. Castro Sundblad, el Capitán Pedro N. Zeballos y los Mayores Doralio Hermosid y Adolfo

Benavídez también conspiraban. Es sabido, que la revolución de 1905 fracasó, que Calvete resultó detenido en Buenos Aires, y que parte de dicho fracaso los radicales lo atribuyeron a la defección del Mayor Tomás Vallée, pues el secreto del éxito de toda conspiración se cifraba en su clandestinidad y tabicamiento, y en la toma de conciencia de la tropa sublevada.<sup>10489</sup>

#### O-IV.- Intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios (1905).

El suicidio de Leandro N. Alem (1897) y el recrudecimiento de las perspectivas guerreras con Chile –que se había disparado por la ocupación chilena del Valle de los Patos y Puente del Inca (Mendoza) en febrero de 1891 durante la presidencia en Chile de José Manuel Balmaceda (AGE-Leg.1184)-- había puesto “...un impasse en la lucha cívica interna del país, postergando la misma para después de celebrarse las paces en el llamado Abrazo del Estrecho [1899]”.<sup>10490</sup> Una vez consumado el duelo por el suicidio de Alem y superada la crisis que había venido provocando la amenaza externa chilena, la lucha retornó al cauce que había quedado trunco a partir de la derrota militar de la Revolución de 1893, pero con la particularidad de estar dirigida esta vez por el mutismo conspirativo de Hipólito Irigoyen, y ya no ser mas la tropa veterana y voluntaria, sino puramente compulsiva y bisoña. A diferencia de Alem, Barroetaveña y Del Valle, que participaban de una estrategia mixta entre lucha armada y oposición parlamentaria o concurrencismo, su sobrino Yrigoyen había impuesto una estricta e intransigente política de abstención revolucionaria.<sup>10491</sup> El mismo fenómeno de tregua sorda y muda se reiteró en 1908, cuando la competencia militarista con el Brasil (Paz Armada) amortiguó las continuas amenazas de nuevos levantamientos militares.<sup>10492</sup>

El cauce trunco o tregua sorda que duró una docena de años (1893-1905) se destapó en la madrugada del día 4 de febrero de 1905. La revolución se manifestó en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires. En Córdoba, la insurrección tomó de sorpresa a sus jefes y oficiales superiores. Hallándose el Jefe del Regimiento 8 de Infantería Coronel Ranulfo Ferreyra de la Cruz en su domicilio, ubicado en el paraje Las Rosas (Córdoba), a 35 cuadras del Cuartel, del cual era su Jefe, “...fue despertado por ruido de descargas de fusilería y, alarmado, monté a caballo dirigiéndome al cuerpo de mi mando, donde al llegar fui rodeado por unos 30 o 40 **ciudadanos** que con fusiles me apuntaban e intimaban mi rendición”.<sup>10493</sup> Entre los sublevados estaban, de acuerdo al testimonio del Coronel Ferreyra de la Cruz, el entonces Mayor D. Mauricio Solá, 2º Jefe del Cuerpo y el Subteniente del mismo, D. Amancio Mercovich, amén de numerosos civiles entre los cuales se encontraban Aníbal Pérez del Viso y Delfor del Valle (hermano menor de Aristóbulo del Valle). El primero se aproximó a “...darme cuenta de que se habían llevado el cuerpo y como estaba solo e imposibilitado de defenderme, pues sólo tenía la espada, fui tomado preso y conducido al Cabildo, donde era vigilado por cuatro ciudadanos”.<sup>10494</sup>

Por lo general, en estas ocasiones, los oficiales arrestados no eran comunicados. Estando el Coronel Ferreyra arrestado y próximo a un grupo de soldados de su batallón, que se encontraban en éste, engañados por los sublevados, y habiendo sido descubierto cuando intentó ponerse al habla con ellos, el insurrecto Mayor Esteban García le dijo a Ferreyra de la Cruz que se presentase al titulado Gobernador que era el ex Teniente Coronel Daniel Fernández [16-6-I], gravemente herido en las violentas jornadas. Pero Fernández a su vez “...me dijo tener conocimiento de que yo trataba de contrariar sus

órdenes y que lamentaba que su actitud de revolucionario me perjudicara, invitándome a que yo no intentara nada contra los hechos consumados, a lo que contesté: “si yo pudiese reunir veinte hombres, con ellos trataría de recuperar mi cuerpo”.<sup>10495</sup> Al escuchar “...mi respuesta nos hizo retirar, diciéndome que él sabría cumplir con su deber”.<sup>10496</sup> Una vez vencido en combate, Fernández debió abandonar la lucha y tuvo que pedirle al Coronel Pedro Toscano, “...hiciera el sacrificio de encargarse del mando, para evitar graves males a la ciudad de Córdoba”.<sup>10497</sup> Toscano aceptó la delegación de manos de un insurrecto, y al concurrir al cuartel debió imponerse a mano armada, para lo cual tuvo que ultimar a un sargento, evitando que la tropa insurrecta, cuyos jefes habían capitulado, se amotinara, salvando así a Córdoba de “...horrores más graves y trágicos que los ocurridos en Pirovano [Buenos Aires]”.<sup>10498</sup> Cuando el General Lorenzo Wintter, llegó a Córdoba, luego de la rendición, Toscano también fue arrestado.

Una vez en la Policía, el Mayor Esteban García --que había participado en la captura del vice-presidente de la República José Figueroa Alcorta así como del hijo y del yerno de Roca— que se titulaba “...jefe de la repartición puso en libertad al Cnel. Ferreyra de la Cruz”.<sup>10499</sup> Inmediatamente, Ferreyra se apersonó al Coronel Toscano, su jefe inmediato superior, “...quien se encontraba acompañado del [Gobernador José E.] Garzón”.<sup>10500</sup> Este último es tal vez, “...el más autorizado para dar informes sobre mi actuación en esa jornada revolucionaria y podrá también atestiguar que cuando él propuso retirar 25 fusiles de los que habían depositados en el Tiro Federal, los que se sacarían escondidos en un carro cargado de pasto, fui yo quien se ofreció a llevar a cabo dicha empresa. Como el Coronel Toscano no tuviera orden alguna que darme me presenté al Regimiento 1º de Artillería”.<sup>10501</sup> Y cuando el Coronel Ferreyra quiso --una vez desistida la revolución-- ponerse al frente de su cuerpo, “...el cual había sido abandonado por los Oficiales jefes del motín, fui impedido de hacerlo por el Coronel Toscano, y una vez que el General Lorenzo Wintter llegó a Córdoba, fui nuevamente arrestado”.<sup>10502</sup>

#### **O-V.- Ausentismo del lugar de destino como desertión y traición (1905).**

Otro de los casos que despertaron inusuales sospechas por parte de los instructores del sumario incoado por la justicia castrense era el de aquellos oficiales que se encontraron al momento de la insurrección ausentes de su lugar de destino. Un día antes de la Revolución del 4 de Febrero de 1905, en Córdoba, con motivo de ser el cumpleaños de su esposa, el Jefe del Batallón de Infantería Teniente Coronel Belisario Villegas [14-10-I] se trasladó a Río Ceballos (Córdoba) punto de residencia de su familia “...situado en las sierras a 8 leguas de la Ciudad, de la cual tuvo conocimiento el Jefe accidental de la Región, mi 2º Jefe y oficiales del Batallón; aunque de ello no hay constancia escrita y el primero ha negado esta afirmación en la defensa de su causa, fue confirmada en el curso del proceso y por los antecedentes que anteriormente expongo que son de publica notoriedad”.<sup>10503</sup>

Esto explica la ausencia del Teniente Coronel Villegas del cuartel en la noche del 3 de febrero y primeras horas del día 4, “...en los momentos en que el ejército entero inclusive las fuerzas sublevadas han sido sorprendidas por el incalificable movimiento, no obstante de que consta en un documento público trascendental, que de este movimiento el Superior Gobierno ha tenido conocimiento exacto con 48 horas de anticipación”.<sup>10504</sup>

El día 4 de febrero a las 9 de la mañana, ajeno por completo a lo que sucedía en la Ciudad de Córdoba, que estaba tomada por los sublevados, regresaba el Teniente Coronel Villegas del Río Ceballos, quien informó que en un coche que "...yo mismo guiaba, a las 3 leguas de marcha me detuve algunos minutos para dar descanso a los caballos, cuando sentí lejanos tiros de cañón que atribuí a ejercicios de artillería en las sierras o tiros de minas en las canteras de cal, apenas emprendida de nuevo la marcha encontré un cochero que venía huido de la Ciudad por él me informé en pocas palabras lo que sucedía, aconsejándome no seguir por el camino de coches porque no era posible entrar a la Ciudad sin caer prisionero, considerando exagerado los informes precipité mi marcha hasta extenuar los caballos".<sup>10505</sup> En el momento de llegar a la estancia del Señor Elías Larrose, cajero del Banco de la Nación en Córdoba, a las 11 a.m. mas o menos, "...dicho Señor me confirmó la versión anterior y me facilitó dos caballos un revolver y un vaquiano, se perdió en ello cerca de una hora por tener que tomar los caballos en potrero".<sup>10506</sup>

Recién a mediodía (las 12 aproximadamente) pudo Villegas seguir viaje "...rodeando la ciudad para llegar al Cuartel mas o menos media hora después".<sup>10507</sup> Villegas encontró el Cuartel "...ocupado por fuerzas revolucionarias compuestas de 36 a 40 hombres del Regimiento 10 de Caballería y varios particulares armados, que al verme entrar al galope, formaron en grupos, uno de los cuales al mando del Subteniente [Eduardo] Catán del 10 de Caballería y el maestro de armas [Horacio] Tort corrieron a rodearme".<sup>10508</sup> Al mismo tiempo, los oficiales leales del Batallón Mayor Carlos Spika y Teniente Abraham Schweizer [30-1-C], se le presentaban a Villegas, "...informándome el primero que en ese momento acababa de entregar el Cuartel a los revolucionarios y que no había en el Cuartel sino los enfermos del Batallón".<sup>10509</sup> Recién entonces Villegas pudo darse cuenta de la situación, "...y para resolver lo que debía hacerse descendí del caballo y llamé a la Mayoría al Mayor [Carlos] Spika [16-17-A], allí me informó que en la mañana de ese día a la 1 a.m. el subteniente [Ángel] Iza como capitán de cuartel y los Subtenientes León Quaglia y [Juan Eusebio] Aquino encargados de compañías habían sacado el Batallón, engañando a las clases que por mi orden marchaban a **combatir una gran huelga**".<sup>10510</sup>

El Mayor Carlos Spika le informó a Villegas "...que él con el Teniente Schweizer habían ocultado entre unas parvas de pasto unos ochenta fusiles y diez mil tiros; nos hallábamos aún deliberando sobre la manera de reconquistar nuestra tropa cuando se presentó el Jefe del E. M. de la Región y confirmó que la revolución había triunfado por completo, que las autoridades se hallaban prisioneras y consideraba inútil toda resistencia, y que el Regimiento 1º de Artillería único cuerpo que pudo resistir [al mando del Comandante Gregorio Vélez (10-24-A)] había firmado o firmará un **compromiso de no tomar la ofensiva**".<sup>10511</sup>

Poco más luego, a las 3 de la tarde mas o menos, Villegas montó a caballo "...acompañado del Comandante Olmos, Mayor Spika, Teniente Schweizer y varias otras personas que en el momento no recuerdo en razón del tiempo transcurrido, pero que en el proceso han sido citados por constarles la exactitud de lo que dejo expuesto, fui a presentarme al Jefe de la Región Coronel Pedro Toscano a quien encontramos en su domicilio, me confirmó las noticias dadas por su Jefe de E.M. agregando que tenía a su cargo la policía de la ciudad a los efectos de la conservación del orden, y como se manifestaba indignado por la falta de lealtad de los oficiales revolucionarios yo le manifesté que con su ayuda era fácil tomar revancha utilizando los ochenta fusiles que

tenía ocultos en el Cuartel, el Coronel aceptó la idea y me ordenó retirarme a mi domicilio y esperar órdenes”.<sup>10512</sup> Esperando ordenes hasta las primeras horas de la noche, y como Villegas hasta entonces no recibiera ninguna orden, “...fui nuevamente a su domicilio sin encontrarlo, regresaba a mi casa cuando encontré en la calle al Diputado Nacional Ingeniero Eleazar Garzón, actual **Director de Tierras y Colonias**, y al manifestarme que en su quinta podría disponer de un grupo de gente decidida y que solo le faltarían armas para efectuar una contrarrevolución, yo le dije que si él me podría dar diez hombres armados a revolver yo me comprometía a sacar del cuartel ochenta fusiles y diez mil tiros; agregué que el Coronel Toscano cooperaría en ese sentido”.<sup>10513</sup> Es así que Villegas trata de estimular a Toscano para que deje la actitud reticente con que se manifestaba y recupere el cuartel.

Convinieron entonces en que Garzón hablaría con el Coronel Toscano y que esa misma noche Villegas y Garzón “...encabezáramos la acción, a media noche fui a buscarlo en su domicilio sin encontrarlo, pero me dejó un mensaje de que el día siguiente a las 10 de la mañana nos veríamos”.<sup>10514</sup> A esa hora el Sr. Garzón habló con el Coronel Toscano sin que “...me conste el resultado que tuvo, observándome el Sr. Garzón que no bien él había creído seguro el éxito de tomar el Cuartel y retirar el armamento por su poca guarnición era poco probable que pudiéramos resistir el ataque de todas las fuerzas que sin duda nos perseguirían, lo que convenía evitar distrayendo la atención de los revolucionarios en otra parte”.<sup>10515</sup>

Acota Villegas que como estaba pendiente aún la orden que había dado el Coronel Toscano de “...esperar en mi domicilio regresé a él, encontrando a mi casera con la noticia de que una patrulla de soldados al mando de un oficial había penetrado en mi busca registrando todos los muebles y rincones de la casa”.<sup>10516</sup> Villegas volvió a salir de su casa “...y reuniéndome con el Mayor Spika fuimos nuevamente a la casa del Coronel siendo informados por el Mayor [Juan José] Coudannes [27-51-A], su ayudante, que el Coronel acababa de ser conducido preso”.<sup>10517</sup>

## O-VI.- Fabricación de sumarios fraguados (1905).

Numerosas injusticias se cometieron con motivo de la Revolución de 1905.<sup>10518</sup> Se llegaron a fabricar o fraguar sumarios para perjudicar a adversarios inocentes. Habiendo sido acusado el Juez de Instrucción Militar Mayor Brígido Zavaleta de conspirar contra el Gobierno de la Nación, en un movimiento revolucionario, juntamente con los Mayores Delfín Ovejero y Ricardo Pereyra Rosas (16-25-I), en virtud de “...una Lista que se tomó a un Señor Rodríguez Ocampo y en la cual efectivamente figuraban los dos Mayores citados, pero no así el suscripto, cuyo nombre fue posteriormente agregado, como lo supe inmediatamente después”.<sup>10519</sup> Zavaleta tuvo que ir varias veces a Buenos Aires para comprobar su inocencia ante el Señor Ministro de Guerra Gral. Enrique Godoy. Ante el dicho General Godoy, Zavaleta comprobó con un documento expedido por el Jefe de Policía de Tucumán “...que certificaba que cuando esa Policía secuestró la Lista que tenía Rodríguez Ocampo, mi nombre no figuraba en dicha Lista, y de lo cual el Señor Ministro fue el más sorprendido”.<sup>10520</sup> No obstante esa documentación, elocuente de la inocencia de Zavaleta, los perjuicios que “...me causaron no fueron reparados, viéndome en el caso de solicitar el retiro para evitarme mayores males”.<sup>10521</sup>

El Jefe de la Región Militar General Saturnino E. García, el mismo que había sumariado y procesado injustamente en 1906 al Mayor Antonio Tassi (16-37-I) por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un superior tenía como Ayudante al Capitán Pedro Raffo (18-15). Dicho Capitán Raffo vivió "...siempre en discordia con su igual jerárquico en ese tiempo Carlos A. Gorsse (16-41-I), y se había propuesto, dada su influencia con el Jefe de la Región [García], hacer enjuiciar, como lo hizo, al Capitán Carlos A. Gorsse, por indecoro militar, siendo el suscrito [Brígido Zavaleta] el encargado como Juez de Instrucción Militar de proceder a la ejecución del sumario".<sup>10522</sup> Debe advertirse que el exponente Zavaleta, "...por rara coincidencia, se hallaba enemistado con el Capitán Gorsse".<sup>10523</sup> Bajo la impresión sugerida por el Capitán Raffo, el Jefe de la Región Saturnino García "...me llama a su presencia, y me manifiesta la necesidad de sumariar al Capitán Gorsse por indecoro militar, en razón de que se presentaron ante el Jefe un lechero y un panadero acusando a Gorsse por deudas de \$12 y \$15, respectivamente, que les debía cuando este estuvo por primera vez en Salta, siendo Subteniente".<sup>10524</sup> Al recibir del Jefe Saturnino García la manifestación que "...me hacía, le expresé que no correspondía sumario, porque el indecoro militar consistía en contraer deudas por motivos viciosos y no pagarlas, y que, el caso presente, si no estaba prescripto, correspondía a la Justicia de Paz".<sup>10525</sup> A raíz de esta respuesta, "...dio principio a mi vía crucis, y a pesar de mi observación y haberlo manifestado que me encontraba enemistado con Gorsse, me ordenó hacer el sumario, como lo hice, concluyendo no obstante, por pedir el exponente el sobreseimiento definitivo de la causa, la que fue confirmada por el Sr. Ministro de Guerra, previo informe del Auditor".<sup>10526</sup>

Y como botón de muestra del trato dispensado a los Revolucionarios de 1905, que muy bien podría explicar la inacción y la caída de brazos de gran parte de la oficialidad radical un cuarto de siglo después, en septiembre de 1930, basta con mencionar el caso del Teniente 1º Arturo Orfila (21-119-A), quien con motivo de haber sido destinado a un Distrito de los que por su situación aislada y alejada se conoce como destino de castigo hizo gestiones extraoficiales "...para obtener otra situación más apropiada a mis aptitudes y afición al servicio".<sup>10527</sup> Orfila obtuvo como resultado "...que se le dijese a la persona que se encargó galantemente de esa gestión (el hoy Secretario de la Presidencia de la República, doctor Arturo Benavides [2ª Presidencia de H. Yrigoyen]) que era inútil toda pretensión de mi parte, pues tanto el entonces Señor Ministro, cuanto el que hablaba, Jefe del Gabinete Militar, estaban dispuestos a "reventarme" y que, lo mejor que podía yo hacer era solicitar mi retiro".<sup>10528</sup> Todo esto revela como las desavenencias mutuas de los oficiales en servicio activo llevaba a un permanente estado de rencillas y murmuraciones, que generaban la instrucción de sumarios por acusaciones nimias y/o falsas que arruinaban sus respectivas carreras.

## O-VII.- Conclusiones

Cuando el orden burocrático-oligárquico no pudo perpetuar mas sus estructuras y dispositivos de dominación civil y militar ensayó políticas modernistas o modernizadoras (operaciones de inteligencia militar, de misión civilizatoria en la frontera indígena y de paz armada con las naciones vecinas) destinadas a prolongar lo más posible sus viejos privilegios y a condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden burocrático, de naturaleza popular y democrática. En esa tarea condicionante el establishment político conservador no ahorró esfuerzos ni recursos,

apelando a una gruesa batería de manipulaciones y subterfugios, entre los cuales abundaban el espionaje, la delación, la intriga, los recelos, los arrestos, los fraudes, y las discriminaciones administrativas.

#### **Epilogo-Sección IV-D.-**

Las medidas militares estaban diseñadas a imagen y semejanza de los países centrales, en cuyo espejo se observaban los ejércitos de la periferia mundial. Pero la adquisición de material bélico en Europa no garantizaba su puesta en acción, por cuanto periódicamente era preciso tener que modernizar el número y la calidad de sus accesorios, modificar el calibre de los cartuchos y transformar las piezas, las cureñas, los arzones, y los carros de municiones. Por ello, las fallas en el armamento adquirido y los actos de corrupción detectados en el desempeño de las Comisiones destinadas en Europa afectaron el desarrollo de una industria militar nacional, en ese entonces personalizada en la Fábrica Nacional de Pólvora y el Arsenal de Guerra.

Por otro lado, las movilizaciones y concentraciones de campaña y las pandemias en ellas generadas fueron vitales para que las autoridades militares y políticas tomaran conciencia de la necesidad perentoria de construir una logística y una infraestructura edilicia que brindara resguardo a la tropa como a la oficialidad. Una logística que se preciara a sí mismo debía contemplar la homogeneización de la indumentaria, la conversión e intercambiabilidad de los recursos (material rodante), los cálculos de tiempo en los aprovisionamientos, la provisión de los insumos auxiliares (agua y combustibles), y la salud y seguridad de la infraestructura vial y telegráfica.

Y cuando el orden burocrático-oligárquico no pudo perpetuar más sus estructuras y dispositivos de dominación civil y militar ensayó operaciones de militarización de la política destinadas a nacionalizar al inmigrante y a esmerilar o condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden democrático-popular. En esa tarea militarizadora los gobiernos apelaron a una gruesa herramienta de manipulaciones e instrumentaciones entre las cuales se encontraban la represión del conflicto de clase, las intervenciones federales en las provincias, el servicio militar obligatorio, y la modernización armamentista dependiente en perjuicio de una industria nacional. Al no poder el orden oligárquico perpetuar más sus estructuras y dispositivos de dominación, ensayó también operaciones de deformación endógena destinadas a devaluar y desarmar la moral de los disidentes de la institución armada. En esa tarea deformadora y pretoriana los gobiernos apelaron a una gruesa batería de manipulaciones administrativas entre las cuales se encontraban la rotación de arma, la manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma, y la discriminación política en las prisiones, promociones y ascensos.

Finalmente, cuando el orden oligárquico no pudo perpetuar mas sus estructuras y dispositivos de dominación ensayó políticas modernistas o modernizadoras (operaciones de inteligencia militar, de misión civilizatoria en la frontera indígena y de paz armada con las naciones vecinas) destinadas a prolongar lo más posible sus viejos privilegios y a condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden burocrático, de naturaleza popular y democrática. En esa tarea condicionante el establishment

político conservador no ahorró esfuerzos ni recursos, apelando a una gruesa batería de manipulaciones y subterfugios, entre los cuales abundaban el espionaje, la delación, la intriga, los celos, los arrestos, los fraudes, y las discriminaciones administrativas.

## **Sección IV-E**

### **Capítulo IV-E-16      Epílogo**

La producción de un poder popular y democrático, que pueda equipararse o balancearse con el de la fuerza de estados oligárquicos y pretorianos, requiere no sólo de una política y una dirección acordes, sino también necesita acudir a una reinterpretación de las dimensiones del estado, de sus tipos de dominación estamental, patrimonial y burocrático, y de sus categorías sucedáneas de orden y progreso.

En ese sentido, esta obra se inicia con la descripción de un sistema político que construyó en la segunda mitad del siglo XIX sendos órdenes institucionales burocrático-patrimoniales (educacional y territorial). Entre los centros de gravedad o centros de potencia y movimiento, tanto físico como moral, alrededor de las cuales se construyó un modelo multipolar se dieron las políticas educativas, militares y colonizadoras, que tuvieron en su esfera puramente castrense las expresiones más elocuentes en la formación del Colegio Militar de la Nación primero y la Escuela Superior de Guerra más luego.

Una vez alcanzada en ellas una institucionalización meritocrática e ilustrada y cuando el orden nacional-republicano intentó extenderse infructuosamente a la escala territorial del estado-nación, con el ulterior propósito de lograr el monopolio de la violencia legítima, comenzaron a multiplicarse los centros de gravedad, y a imponerse en el modelo multipolar un orden oligárquico-predatorio que tuvo sus primeras armas en la frontera territorial y sus víctimas en el eslabón más débil, consistente en las poblaciones originarias.

Este orden oligárquico-patrimonial predatorio y esta multiplicación de los centros de gravedad no fue posible perpetuarlos sino mediante una fuerte presencia de diversos dispositivos, entre los cuales se destacaron aquellos vinculados con la impunidad de actos lesivos a la dignidad humana y ciudadana. Dichos dispositivos incluyeron fueros especiales, métodos de reclutamiento fundados en la financiación procedente de empréstitos externos, en la captación cleptocrática de conciencias mediante certificados de tierras, ascensos y honores, y en la cohesión del espíritu de cuerpo mediante instrumentos de endogamia corporativa, todos los cuales arrastraban fuertes cuotas de corrupción.

Como es de suponer, este orden político fundado en dispositivos tan vulnerables como vituperables tuvo necesariamente que degenerar en lo que se conoció luego como un orden burocrático-patrimonial oligárquico. Este orden oligárquico dio lugar a su vez a un clima conspirativo que fue fragmentando el espíritu de cuerpo o cohesión corporativa de las Fuerzas Armadas, al extremo de desatar un proceso insurreccional de largo plazo e intensidad creciente. Para frenar dicho proceso, los intereses internos y externos amenazados iniciaron una contraofensiva destinada a debilitar el frente revolucionario

(democrático-popular) mediante tácticas, estrategias y ocultamientos de un pretorianismo árbitro e indirecto de base oligárquica.

Finalmente, cuando el orden burocrático-patrimonial oligárquico no pudo perpetuar mas sus estructuras de dominación civil y militar ensayó políticas modernistas o modernizadoras (operaciones de inteligencia militar, de “misión civilizatoria” en la frontera indígena, de paz armada con las naciones vecinas, y de deformación de las estructuras militares internas) destinadas a prolongar lo mas posible sus viejos privilegios y a condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden burocrático, pero de naturaleza popular y democrática.

**Tomo-V Perversiones institucionales y fracaso de un orden nacional-republicano (Argentina, 1880-1912).**

## Indice del Tomo-V

## Sección V-A      Extorsiones en los ámbitos de la cultura

## Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder

Capítulo V-0                      Introducción del Tomo-V                      3

## Sección V-A Extorsiones en los ámbitos de la cultura

Capítulo V-A-1	Autonomía de las elites en la Argentina Republicana	17
Capítulo V-A-2:	Segregacionismo en la educación secundaria.	17
Capítulo V-A-3:	Empastelamiento de imprentas y chantajes en el periodismo.	30
Capítulo V-A-4:	Censura en las transmisiones telegráficas.	13
<b>Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder</b>		
Capítulo V-B-5	Nepotismo e incompatibilidades de sangre en las provincias.	32
Capítulo V-B-6:	Traslado y revocación de jueces como mecanismos facciosos.	23
Capítulo V-B-7:	Burla del ciudadano y el comicio como encrucijada bélica.	23

Capítulo V-B-8:

Vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas librecambistas<sup>5</sup>

Capítulo V-B-9:

Profesionalización del ejército y su gangrena en las intervenciones federales. 26

Capítulo V-B-10

Gerencias bancarias como anfiteatro de "Situaciones" provinciales 15

## Sección-V-C

Capítulo V-C-11: Conclusión 2

Total de páginas 169

Total de páginas de los cinco tomos 1670

## Capítulo 0 Introducción

Habiendo investigado en los tomos tercero y cuarto el impacto de la modernidad en la política y en la milicia, ahora pretendo encarar la repercusión de la misma en las restantes instituciones del nuevo orden nacional-republicano. Producida la victoria de Pavón (1862), amén de los conflictos puramente políticos y militares desatados con el objeto de producir la unidad nacional, es decir secularizar el estado y construir el estado-nación, piezas claves del proyecto modernizador, se fueron desatando también otra suerte de conflictos en el seno de los embrionarios niveles institucionales, tales como los educativos, periodísticos, comunicacionales (telegrafía), judiciales y militares. Estos últimos se centraron en la discusión del grado e intensidad en que estas instituciones debían venir a reproducir o a transformar las estructuras sociales, políticas y económicas.

La formación del estado-nación o la gestación de la modernidad implicó para Charles Taylor (1997, 2000) la combinación de tres (3) elementos: a) el nacimiento de una esfera pública, b) el desarrollo de una economía de mercado, y c) la formación de ciudadanía.<sup>10529</sup> Más aún, en la creciente gestación de la esfera pública desglosada de lo puramente privado, propuesta por Habermas (1989), y en las previas tesis sobre la autonomización de las élites, formuladas por Schumpeter (1942, 1950, 1954), Aron (1954, 1965), Downs (1957); y Lipset (1960); están sin duda comprendidos casi una decena de principios caros al orden nacional-republicano:

a) laicización de la sociedad (separación de la sociedad civil y la sociedad política o de la religión y la política);

b) secularización del estado (separación entre iglesia y estado);

- c) escolarización de la educación;
- d) desmilitarización o separación entre ejército y gobierno;
- e) independencia de la justicia que garantice el cumplimiento de los contratos;
- f) división de poderes entre el ejecutivo, judicial y legislativo;
- g) periodicidad de los cargos públicos.<sup>10530</sup>
- y h) respeto de las libertades de conciencia, de prensa y de cátedra;

Pero las teorías de los conflictos intra-élite (Etzioni-Halevy, 1994), al enfatizar la centralidad de los acuerdos entre elites para la consolidación de la democracia, llevaron a subestimar la noción de la necesidad de la autonomía de las mismas (eclesiásticas, periodísticas, universitarias, judiciales, parlamentarias, militares, etc.) respecto del resto del aparato del estado.<sup>10531</sup> Sin embargo, para liberales como Macedo (1990) y Galston (1991), para bloquear el paso de posibles opresores no bastarían los mecanismos institucionales del orden republicano como la división de poderes, el bicameralismo, la independencia de la justicia, las incompatibilidades de oficio, etc. sino que serían imprescindibles cierto grado de virtudes cívicas y de preocupación por lo público.<sup>10532</sup>

Cabe entonces preguntarse:

- a) ¿para la consolidación de la república, el federalismo y la democracia eran centrales los pactos o acuerdos entre las elites o la autonomía entre las mismas?
- b) ¿amén del localismo y el nepotismo, existieron en el orden nacional-republicano otras inhibiciones e incompatibilidades que afectaran los principios de secularidad, civilidad, federalismo, división de poderes, independencia de la justicia, periodicidad de los cargos públicos y libre asociación y circulación de las elites?;
- c) ¿existieron en el orden nacional-republicano innovaciones institucionales y tecnológicas (Bancos, Colegios Nacionales, Clubes, Justicia Federal, Colegios Electorales, Ejército Nacional, Iglesia, Correos, Telégrafos, Ferrocarriles, etc.) cuya incorporación:
  - 1) se desajustara con los subsistemas políticos vigentes (estructuras parlamentarias y ejecutivas, federalismo, división de poderes, periodicidad de los cargos públicos y autonomía provincial);
  - 2) extendiera geográficamente el área de influencia del poder estatal central;
  - y 3) acelerara la velocidad de las comunicaciones?;
- d) ¿estas innovaciones fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o, por el contrario, se corrompieron anarquizando el sistema político, poniéndolo al servicio de los intereses y los resabios de un orden colonial-absolutista, aún inconcluso, y reproduciendo las miserias de un estado autocrático y de lo que se dio en llamar un estado oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas)?.
- y e) ¿entre la magistratura, la elite política (Legisladores, Convencionales Constituyentes y Electores), la iglesia, la milicia, la docencia, las comunicaciones (tribuna política, periodismo, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles, etc.), la banca, los clubes

políticos y los Gremios Artesanales reinaba una homogeneidad o, por el contrario, una heterogeneidad social, económica, política e ideológica?.

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los discursos localizables,<sup>10533</sup> ni una historia de las gestiones de gobierno, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron del comportamiento de diversos actores públicos (funcionarios, periodistas, jueces, rectores, profesores, militares, gerentes de bancos, parlamentarios, sacerdotes, etc.).

## **Plan del Volumen**

Este tomo se desarrolla en dos diferentes secciones compuestas por diez (10) capítulos. En la primera sección analizo la autonomía de las élites expresada en las incompatibilidades de oficio, la educación como espacio de lucha política circunscrito a los Rectorados y las cátedras de los Colegios Nacionales, el periodismo como campo de competencia conflictiva, y la censura en el sistema comunicacional telegráfico. En la segunda sección encaro el estudio del nepotismo y las incompatibilidades de sangre, los traslados y las revocaciones en el aparato judicial, la burla del ciudadano y el comicio como encrucijada bélica, la vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas librecambistas, la profesionalización del ejército y su gangrena en las intervenciones federales, y las gerencias bancarias como lugar de lucha en las "Situaciones" Provinciales.

## **Sección V-A            Extorsiones en los ámbitos de la cultura**

### **Capítulo V-A-1.            La autonomía de las élites en la Argentina Republicana.**

#### **Índice**

- A-I    Fracturas modernas en el origen de los conflictos provinciales.
- A-II   Incompatibilidades de oficio
- A-III   Incompatibilidades judiciales y parlamentarias.
- A-IV   Incompatibilidades docentes.
- A-V    Aparición de la prensa en la lucha política.
- A-VI   Incompatibilidades militares.
- A-VII   Práctica exacerbada del federalismo.

#### **A-I    Las fracturas modernas en el origen de los conflictos provinciales.**

Batido militarmente el liberalismo Mitrista en La Verde (1874), agotada la estrategia conciliatoria del Avellanedismo (1877) y fortalecido el poder del Autonomismo Nacional en todo el país a partir de la victoria militar que significaron los sucesos del 80 (Barracas y Puente Alsina) --una suerte de revancha de la derrota sufrida en Pavón (1862)-- se impuso una etapa de transición política, una suerte de contraola regresiva, donde sin embargo imperaron estrategias reformistas, secularizantes y laicizantes de índole constitucional, legislativa, ministerial y municipal.

La razón de ser de las Reformas Constituyentes Provinciales, signadas por el espíritu liberal del siglo, obedecía a que la independencia de los poderes en las provincias -- argumento central en que fincaba el orden republicano-- era una utopía, pues lo que reinaba en ellas era la omnipotencia o hipertrofia del Ejecutivo y la subordinación de los Poderes Legislativos y Judiciales.<sup>10534</sup> En los tiempos en que regían contra-olas regresivas, las mayorías legislativas "...eran siempre unánimes en favor del ejecutivo, se reunían cuando el gobernador lo necesitaba, y sancionaban [sólo] los proyectos que [el gobernador] les sometía".<sup>10535</sup> Pero no obstante la comunión por aventar estos resabios de atraso institucional, ciertos proyectos de reforma constitucional provincial, el de las provincias de Salta (1876), San Juan (1878), Entre Ríos (1883), Catamarca (1883) y Santiago del Estero (1884), que alcanzaron a ser promulgados, fueron a la postre boicoteados, durante la misma contra-ola regresiva que los engendró. Los propios Colegios Electorales Provinciales, creados por las Reformas Constitucionales para elegir a los Gobernadores y Representantes, estrecharon aún más en cada provincia el círculo de la elite dominante.<sup>10536</sup>

La Reforma Constitucional de Salta, que contemplaba la creación de un Colegio Electoral, fué falseada por la omnipotencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo coaligados. El Dr. Delfín Gallo, en la sesión de la Cámara de Diputados de 1877, denunciaba que en la provincia de Salta no regía un orden republicano porque no era el pueblo el que elegía a sus autoridades, a través del Colegio Electoral, previsto por la Constitución de Salta (y a cuyos miembros se les negaba el derecho a requerir la intervención federal), sino el Poder Ejecutivo en connivencia con la Legislatura.<sup>10537</sup>

En San Juan, en 1875, la Reforma Constitucional incorporó el sufragio directo y a simple pluralidad, creó el cargo de vice-gobernador, instituyó la bicameralidad, y estableció el régimen municipal.<sup>10538</sup> En su artículo 72, la Constitución Sanjuanina prohibía "...con pena de destitución nombrar senador al Gobernador o Ministros hasta dos años después de su cer [hueco]".<sup>10539</sup> El Cer o hueco era una institución de raigambre colonial, interna a los Cabildos, que prescribía un intervalo o interregno de dos o tres años entre cargo y cargo.<sup>10540</sup> Este artículo era considerado por Nataniel Morcillo y sus seguidores el

"...más importante de la Constitución, especialmente para San Juan, en cuyas funciones políticas locales, siempre aparecía como manzana de discordia las senaturías de los Gobernadores".<sup>10541</sup>

Pues bien, al año de ponerse en vigencia la nueva Constitución Sanjuanina, en 1879, el Gobernador Agustín Gómez, quien aspiraba a la Senaduría, "...influyó privadamente entre sus amigos de la Cámara para reformar la Constitución,..., suprimiendo el art. 72".<sup>10542</sup> En esas circunstancias, reconociendo Morcillo la legítima aspiración de Gómez al puesto de Senador Nacional, por las grandes amarguras sufridas en el pasado, se le ocurrió una estratagema o coartada que salvaba todos los escrúpulos constitucionalistas y burlaba la prohibición del art. 72, "...sin [necesidad de] reformar la Constitución".<sup>10543</sup> La posición de Morcillo era que se lo eligiese de Senador a Vicente Celestino Mallea,<sup>10544</sup> íntimo amigo de Gómez, y como Diputados Nacionales al Ministro Ángel Rojas y al propio Agustín Gómez. La estratagema consistía en que al cabo de los cuatro años que duraba el mandato de Diputado, y hallándose ya Gómez fuera del plazo estipulado por el art.72, renunciara Mallea al cargo de Senador, y la Legislatura nombrara a Gómez por los años que le faltaran a Mallea para cumplir su mandato.<sup>10545</sup>

## A-II Las incompatibilidades de oficio

En Tucumán, la Reforma Constitucional también adoptó el Colegio Electoral, independiente de la Legislatura, y el sistema bicameral, y prolongó el mandato gubernativo de dos a tres años.<sup>10546</sup> La Reforma Constitucional de Catamarca adoptó el sistema bicameral y eliminó la exigencia de los dos tercios de los votos para la sanción de las leyes.<sup>10547</sup> En cuanto a la Constitución de Santiago del Estero, elaborada en 1884 por el Dr. José N. Matienzo, que adoptaba la bicameralidad, el voto secreto, las incompatibilidades legislativas y la representación de las minorías fue modificado veinte años después (1903) por el Gobernador Pedro Barraza, para retornar a la Constitución originaria del tiempo de los Taboada.<sup>10548</sup> Matienzo denunciaba que en Santiago del Estero no regía un orden republicano porque no era el pueblo el que elegía la Convención Constituyente, sino el Poder Legislativo en connivencia con el Poder Ejecutivo.<sup>10549</sup> Las Legislaturas habían sido en el pasado "...las que nombraban gobernadores en las Provincias y este principio muy discutible en teoría, tenía que producir graves trastornos en la práctica".<sup>10550</sup> Las Legislaturas, que aún hoy designan a los Senadores Nacionales, eran formadas por los partidos

"...teniendo en vista nada mas que esa función importante. Se nombraban electores y no legisladores; eran los partidarios ardientes y fieles los que ocupaban el recinto destinado a la honorabilidad, a la inteligencia y al saber".<sup>10551</sup>

Con respecto a la reforma Constitucional, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le confiaba a su amigo Roca en 1884 sus recelos respecto al clero Santiaguense pues

"...desde hace algunos días se agitan mucho aquí los clérigos y se ocupan en organizar asociaciones para sus fines que indudablemente son políticos mas que religiosos a juzgar por los que llevan la iniciativa y los que los ayudan".<sup>10552</sup>

Rojas manifestaba no saber hasta donde eran los curas capaces de llegar pero "...si no los dejamos hacer su propaganda como en Catamarca, no avanzarán mucho".<sup>10553</sup> El pretexto invocado por los curas para hostilizar al gobierno de Santiago era

"...de que queremos reformar la Constitución para establecer en ella cláusulas contrarias a la religión porque somos herejes, lo cual es fácil que hagan creer de Matienzo porque son conocidas sus ideas liberales".<sup>10554</sup>

Pero el régimen republicano fue en nuestras Constituciones sólo una virtualidad, pues las tácticas y las estrategias para burlar la forma republicana de gobierno, los principios de secularización del estado (separación entre la Iglesia y el Estado), de laicización de la sociedad civil (pensamientos, costumbres y planes y programas educativos), las libertades de conciencia, de prensa y de cátedra, la independencia de la justicia, la división de poderes y la periodicidad de los cargos públicos, en lo que iba desde los orígenes del estado Argentino, fueron infinitos, incluso dentro de las instituciones democráticas de los gobiernos constitucionales y dieron lugar a intensas discusiones parlamentarias, periodísticas y epistolares. Cada una de las Leyes y Resoluciones Ministeriales que prescribieron las incompatibilidades significaron adelantos en la vida republicana del país, que al explicitar la división de poderes y asegurar la periodicidad de los cargos públicos y la circulación de las elites dotó a nuestro sistema constitucional de un contenido republicano. Al tener nuestra Constitución solo algunas normas relativas al

régimen de incompatibilidades,<sup>10555</sup> la legislación parlamentaria y ministerial complementó en el orden valorativo los principios republicanos de nuestra Constitución. Los argumentos para impugnar o defender las incompatibilidades de sangre (nepotismo) y de oficios (judiciales y legislativos) giraron esencialmente alrededor de experiencias concretas.

### **A-III Las incompatibilidades judiciales y parlamentarias.**

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>10556</sup> En dicho esquema, las incompatibilidades judiciales y parlamentarias desempeñaban un lugar crucial.<sup>10557</sup> El que los miembros de las Legislaturas o el Poder Judicial, poderes supuestamente independientes del estado nacional y de los estados provinciales, ocuparen cargos como los de Gobernadores, Ministros, Diputados o Jueces (Vocales de las Cámaras de Apelación o de Justicia) o que los Poderes Ejecutivos intervinieran o disolvieran los Poderes Legislativos, fue estigmatizado por políticos como Aristóbulo del Valle y numerosos juristas.<sup>10558</sup>

Pero la división y superposición de poderes y las incompatibilidades judiciales no alcanzaban la misma intensidad en las diferentes provincias de la Argentina moderna. Con las mismas palabras, como si se hubiesen copiado las unas a las otras, en las Constituciones de las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fé, San Juan y Corrientes figuraba la atribución explícita que constituía a las Legislaturas en juez electoral inapelable de las elecciones provinciales.<sup>10559</sup> Al conferir expresamente la facultad para resolver sobre la validez o nulidad de los títulos de sus propios miembros, estas Constituciones le daban a las Legislaturas facultades más amplias, invasoras del Poder Judicial. Pero aún esta facultad, tan amplia como peligrosa, suponía a juicio del político Tucumano, Silvano Bores, {a} "El Zorzal", la salvación de las mayorías, para no alterar la forma republicana de gobierno.<sup>10560</sup>

Pero el articulado de las nuevas Constituciones Provinciales, que incluían cláusulas sobre incompatibilidades, impidiendo ser legisladores y electores a los empleados de los Poderes Ejecutivo y Judicial, demandaban una plétora de recursos humanos calificados y partidos políticos con cuadros mucho más numerosos que pudieran dar abasto a la creciente exigencia de mayor cantidad de funcionarios administrativos y judiciales. La perversa costumbre de "...renovar íntegramente el personal de las oficinas a cada cambio de la política", es decir violar la independencia y autonomía del poder administrador, en el caso de Santiago del Estero, la atribuía José Nicolás Matienzo a "...los malos hábitos dejados por el gobierno personal de los Taboada".<sup>10561</sup> Ese es el motivo que "...no ha permitido la formación de prácticas administrativas regulares", y lo que hacía que los Gobernadores y los Ministros tengan que intervenir "...hasta en los más insignificantes detalles".<sup>10562</sup> Tienen que ser, según la frase del historiador Henry Buckle, "...arquitectos y albañiles a la vez".<sup>10563</sup> Por ese mismo motivo, el recientemente designado Gobernador de Santiago del Estero, Luis G. Pinto, le comunicaba al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman: "...hoy no trato de echar a toda la Administración de Justicia".<sup>10564</sup>

Estas iniciativas tuvieron sus antecedentes en el Congreso de la Confederación. En Córdoba, en 1853, la incompatibilidad entre las funciones inherentes al Poder Ejecutivo y las del Poder Judicial fué establecida en el decreto de creación del Tribunal de Apelaciones.<sup>10565</sup> En 1856 y 1857, un par de proyectos de leyes de incompatibilidad de aquellos ministros y empleados del Poder Ejecutivo Nacional con cargos de Diputado o

Senador, reglamentarios de los entonces artículos 61 y 88 de la Constitución Nacional,<sup>10566</sup> elevados por los Diputados Nacionales por La Rioja José Olegario Gordillo y por Tucumán Filemón Posse Bores, dieron origen a las Leyes 60 y 138.<sup>10567</sup> En Mendoza, la Constitución Provincial llevó las incompatibilidades establecidas en los artículos 64 y 91 de la Constitución Nacional a un extremo absoluto. No podían ser miembros de las Cámaras Legislativas

"...ningún empleado de la municipalidad, ningún empleado a sueldo de la nación ni de la provincia, ni los abogados del banco de la nación y del Banco Hipotecario Nacional".<sup>10568</sup>

Y en Tucumán, en 1898, los Diputados Provinciales decidieron abandonar la banca que ocupaban o dejar los cargos rentados que detentaban.<sup>10569</sup> Sin embargo, después de sancionada la Constitución Nacional, Linares Quintana (1942) nos recuerda que la Cámara de Diputados otorgó permisos o licencias para ser Diputado a algunos Ministros.<sup>10570</sup> En la Legislatura de Santiago del Estero, figuraban en 1882 como representantes del pueblo:

"...el Jefe de Policía, el Fiscal de Estado, el Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno, que actualmente desempeña el puesto de Ministro interino quien firma el mensaje pasado a la Legislatura como miembro del Poder Ejecutivo y en seguida toma asiento como Diputado".<sup>10571</sup>

En Corrientes, en 1878, por violar la Constitución Provincial, que consideraba un fraude integrar el Colegio Electoral con legisladores y empleados de la administración pública,<sup>10572</sup> los liberales Mitristas se levantaron en armas.<sup>10573</sup> En La Rioja, en 1898, la Convención Constituyente sancionó una norma por la cual los Diputados podían ser miembros del Poder Judicial.<sup>10574</sup> En Jujuy, el ex-Gobernador y Diputado Nacional Soriano Albarado delataba que el Comisario Superior de Policía, integrante del Poder Ejecutivo Provincial, incurría en la incompatibilidad de ser a su vez el Jefe del Piquete de Línea.<sup>10575</sup> Y en Catamarca, la Legislatura "...no sólo organiza el poder judicial, autoridades de campaña y poder militar sino que hacen el escrutinio de Electores para gobernador después de nombrar mesas calificadoras y receptoras de votos".<sup>10576</sup> En efecto, el Diputado Nacional Manuel Gorostiaga denunciaba en 1886 que las Legislaturas "...son impotentes cuando no cuentan con la tropa de línea; y cuando cuentan con ella son absolutas".<sup>10577</sup> Las Legislaturas se habían "...deshecho de los Gobernadores, siempre que han tenido los elementos de fuerza de que dispone la nación".<sup>10578</sup> Y eran, a juicio del Diputado Gorostiaga, "...estos elementos de guerra, estos elementos nacionales los que intervienen en la vida de los estados, obstruyendo la marcha regular de las instituciones".<sup>10579</sup>

#### **A-IV Las incompatibilidades docentes.**

En el esquema de racionalización del estado moderno, las incompatibilidades académico-docentes entraron a ocupar también un lugar clave.<sup>10580</sup> El que los Rectores o Presidentes de Universidades, ocuparen cargos políticos como el de Senador o Diputado, fue cuestionado en 1883 con respecto al Dr. Nicolás Avellaneda;<sup>10581</sup> y en 1886 con referencia al Dr. Amancio Alcorta.<sup>10582</sup> Recién a partir de la Reforma Universitaria de 1918 las incompatibilidades académico-docentes entraron a provocar escándalo. En 1924 el Diputado Nacional Enrique Dickmann cuestionó duramente la incompatibilidad en que

había incurrido en el pasado el Senador Nacional Joaquín V. González,<sup>10583</sup> y en la que incurría en ese momento el Dr. José Arce.<sup>10584</sup>

En los planes del Gobierno estaba presente una ley dictada en 1880 que prohibía la acumulación de empleos nacionales y la retención de cátedras sin servirlos, por parte de los Legisladores nacionales. Desde Córdoba, a propósito de la retención de cátedras, el Gobernador Antonio del Viso le escribía a Julio A. Roca informándole que "...hablé con el Dr. Avellaneda [para] que se tome una resolución al respecto. Es esto necesario y moralizador".<sup>10585</sup> Cinco años más tarde, en 1883, el nuevo Estatuto Universitario prohibía, en su artículo 31, la acumulación de más de un ramo de enseñanza en un sólo profesor.<sup>10586</sup> En Salta, el ex-Juez de Primera Instancia Dr. José Benjamín Dávalos detentaba tres cátedras, las de Filosofía, Literatura e Historia, y padecía por ello, en opinión del Dr. Abrahám Echazú, de una "incompatibilidad segura".<sup>10587</sup> Para dichas cátedras se postulaba el Dr. Echazú, aduciendo en su respaldo de una preparación especial, pues

"...en un país en el que no hay teatros ni centro alguno de diversión, las largas horas de las noches las acorto con lecturas de libros sobre ciencias sociales, que son las que armonizan con nuestra carrera".<sup>10588</sup>

En Tucumán, en 1877, el que luego fuera Diputado Nacional Benjamín Posse, a propósito de la actuación docente del Fraile Domingo Ángel María Boisdron, planteó la incompatibilidad de los sacerdotes para enseñar Filosofía o Historia en los Colegios Nacionales.<sup>10589</sup> Es interesante señalar, por la repercusión que la tribuna política poseía como instrumento de contralor democrático de las comunicaciones, que para esa época las bibliotecas registraban la presencia de los libros de Roda (1874 y 1883), acerca del rol de la oratoria en el mundo antiguo.

#### **A-V La aparición de la prensa en la lucha política.**

La aparición de la prensa, o como se ha estilado denominarla: cuarto o quinto poder, hizo necesario contemplar sus relaciones con la burocracia civil, eclesiástica y militar; y su independencia de los otros tres poderes del Estado.<sup>10590</sup> Para la consecución de una república democrática, la prensa libre y las libertades de información, expresión escrita e impresión, es decir lo que Dahl (1971) denomina los niveles de competitividad política, eran consideradas en aquél entonces, a juicio de Duncan (1980) y de Pacheco (1994), como instrumentos más relevantes y fundamentales que la libertad de una tribuna callejera o una elección libre, o lo que Robert Dahl titulaba niveles de participación política.<sup>10591</sup> En ese sentido, la independencia política de un periodista constituía un valor sagrado. Para el jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, la libertad de imprenta debía considerársela como

"...una ampliación del sistema representativo o como una explicación de los derechos que quedan al pueblo después que ha elegido a sus representantes. Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. El pueblo puede conservar y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes".<sup>10592</sup>

Y para McEvoy (1994), analizando el caso Peruano, el periodismo se convirtió en la edad moderna en el medio de lucha no violento más idóneo para promover las campañas electorales con las cuales consolidar las situaciones provinciales.<sup>10593</sup>

La aparición del periodismo en la panoplia de la república moderna hizo necesario entonces contemplar su influencia en las luchas parlamentarias, judiciales y universitarias. Los periódicos oficiales, impresos con dineros públicos, y aquellos subvencionados por los gobiernos de turno se encarnizaban con los opositores.<sup>10594</sup> No obstante que el Gobernador de Salta Juan Solá, de quien se sospechaba un Rochismo encubierto, negó tener participación alguna en los ataques que el periódico *La Reforma* (Salta) hacía al Gobernador de Córdoba Juárez Celman y al de Catamarca Mayor José S. Daza, el periodista Mariano Gorostiaga,<sup>10595</sup> le informaba a Juárez Celman que La Reforma

"...recibe subvención que el Gobernador no quiere quitársela a pesar de habérselo propuesto, lo que me hace creer que su declaración anterior, no tiene valor alguno".<sup>10596</sup>

En Santiago del Estero, en 1882, Luis G. Pinto se puso al frente de su partido

"...para protestar contra las injurias que el diario oficial de Santiago disipaba contra Roca y Juárez, y haciendo fuego a la candidatura de su propio hermano Juan por el solo peligro remoto de que siguiera las inspiraciones de Gallo y no las suyas".<sup>10597</sup>

Y en 1885, el periódico oficial *El País* (Santiago del Estero), órgano del Gobernador Sofanor de la Silva, de quien también se sospechaba Rochismo, no lo defendía al Gobernador de Córdoba Juárez Celman de los ataques de los enemigos Rochistas y daba "...cabida a correspondencia injuriosa hacia Vd.", proveniente de La Reforma de Salta.<sup>10598</sup> Y en Entre Ríos, la prensa Mitrista, que a juicio del Jordanista Evaristo Moreno, blasonaba de independiente, y que en la Revolución del 80 secundaba al Movimiento Tejedorista, es la misma que --al igual que José Hernández desde El Río de la Plata defendió las atrocidades cometidas en la Puna contra poblaciones indígenas--<sup>10599</sup> quemando "...incienso al Gral. Racedo,...se ha puesto completamente a su servicio abdicando de su independencia y liberalismo tan decantado".<sup>10600</sup>

## A-VI Las incompatibilidades militares.

Amén de una secularización de la política, es decir de una separación de la Iglesia con respecto al aparato y estructura del estado, de laicización de la sociedad civil, es decir de desacralización de las instituciones civiles (escuelas, hospitales), y del fomento de las libertades de conciencia, de prensa y de cátedra, también se invocaba la necesidad de una desmilitarización de la política, es decir de una separación del Ejército con respecto al estado.<sup>10601</sup> El que los militares, como los Jefes de Frontera, ocuparen cargos políticos como el de gobernadores o legisladores, fue puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y juristas.<sup>10602</sup> Fundado en la intervención abusiva de los jefes del ejército en las cuestiones políticas provinciales, el periódico *El Nacional* (Buenos Aires) acusaba en 1864 a las Comandancias Militares de convertirse en "una amenaza verdadera" contra la Provincia y el Pueblo, que torna "ilusoria la libertad".<sup>10603</sup> El primer golpe militar acontecido después de Pavón fue padecido por Salta, "...contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado esplicitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política

provincial".<sup>10604</sup> En efecto, a juzgar por los descargos que luego produjera el Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley Wilde,<sup>10605</sup> debido a la agitación política que padecía su tropa, resolvió --de acuerdo con el Gobierno de Uruburu-- sacarla de la Provincia, entrando el 29 de Febrero a la Capital de Jujuy

"...con 147 hombres piquetes de la 1a., 2a., y 3a. Compañía, dejando por orden del Gral. Anselmo Rojo,<sup>10606</sup> cincuenta y más hombres de guarnición en Salta a las inmediatas [ordenes] del Cap. D. Napoleón Uruburu, de la confianza por supuesto del Gobierno".<sup>10607</sup>

Quince días más tarde, el 15 de marzo a las tres de la mañana, las tropas acantonadas en Jujuy, bajo la influencia de un aguacero semejante al diluvio, se sublevaron, y a juzgar por los dichos descargos de Wilde

"...me negó toda obediencia, diciendo que iba a echar a tierra al Gobierno de Salta de acuerdo con el pueblo; y dijo que lo haría de su propia autoridad, supuesto que yo no quería obedecer a su llamamiento. La intentona, el motín se consumó, y temeroso de un saqueo en la Capital [de Jujuy], consentí que dos oficiales los condujeran fuera de la población".<sup>10608</sup>

Como entre los sublevados se encontraban el Subteniente Alfredo Wilde,<sup>10609</sup> y el Teniente Fábregas, oficiales del Batallón 8o. de Línea, Pepe Posse se preguntaba en El Liberal (Tucumán),

"...¿que significa este hecho? ¿creeremos que el hijo se amotinaba contra el padre?. Pero ya sabemos como pensaba el padre en las cuestiones políticas de Salta, y sabemos también que los sublevados querían por la acción lo mismo que su Jefe, luego no hay que hacer esfuerzos de malicia para atribuir el verdadero origen de aquel motín al más interesado en cuestión".<sup>10610</sup>

Cuatro años después, en 1868 el Senador Nacional Nicasio Oroño, en representación de Santa Fé, propuso una ley "...prohibiendo al Poder Ejecutivo mantener fuerzas armadas en el interior de las provincias".<sup>10611</sup> Otros cinco años después, en 1873, el Diputado Onésimo Leguizamón reprochaba a la Cámara, que nunca hubiera mandado a San Luis ninguna Comisión o Diputación para que remediara sus males, pues

"...ha sido por largos años dominada por el Ejército de las fronteras, o más bien por sus jefes. ¡Siempre los Gobiernos haciendo los Diputados al Congreso y a la Legislatura de Provincia!".<sup>10612</sup>

Y tres años más tarde, en 1876, en Santiago del Estero, el Cnel. Octavio Olascoaga,<sup>10613</sup> Comandante del 9 de Línea, había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",<sup>10614</sup> y había logrado --luego de la caída de los Taboada, con la derrota de Mitre en La Verde (1874)-- hacerse reputación de procónsul, o

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el gobierno provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente para sostener por falta de recursos y de prestigio".<sup>10615</sup>

También en Córdoba, el Diputado Nacional Gerónimo del Barco, al parecer de tez cetrina, quien ingenuamente creía que debían adoptarse incompatibilidades entre la milicia y el parlamento, al decir de la pluma racista de Antonio del Viso

"...vino para realizar aquí la conciliación (!!!) y encaminar las cosas por la política parda, que es una Sra. de su familia y stirpe...ha tratado de hacer un bochinchito en la Legislatura, echando o pretendiendo echar a los Jefes y oficiales de Guardia Nacional que son Diputados o Senadores".<sup>10616</sup>

En 1876, en San Luis, el Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. Julio A. Roca, quien en ese entonces era un ferviente admirador del Diputado Onésimo Leguizamón, le manifestaba al Diputado Nacional Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como el caso del Comandante Moreno,<sup>10617</sup> candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad que residen a solicitar puestos públicos".<sup>10618</sup> Y en 1880, el Interventor en La Rioja General Pedro Nolasco Arias, impuso como Senadores Nacionales, sin consultar con partido alguno, a Adolfo Dávila y a Nicolás Barros.<sup>10619</sup>

Como consecuencia de estas impugnaciones e incompatibilidades, la Inspección General de Armas emitió en 1880 una Circular,<sup>10620</sup> al igual que lo hiciera el Ministerio de Instrucción Pública,<sup>10621</sup> y la Jefatura de Policía,<sup>10622</sup> que prohibía a los Jefes en servicio activo tomar parte en las cuestiones de la política interna y electoral de las Provincias. En Salta, el Senador Nacional Francisco J. Ortiz planteó en 1885 la incompatibilidad entre las funciones gubernativas que detentaban Juan Solá y las militares, que ejercía como Jefe de la Frontera del Chaco.<sup>10623</sup> Estas incompatibilidades dieron lugar a que con el tiempo el Regimiento se politizara y cayera en la mayor de las indisciplinas.<sup>10624</sup> Finalmente, el Gobierno destituyó al Cnel. Solá de la Jefatura de la Frontera de Salta nombrando en su lugar al Comandante Baldomero Lamela. Al hacerlo Solá no entregó "...los 20.000 tiros, armas y pertrechos pertenecientes al Regimiento que manda Lamela y que él conserva indebidamente sirviéndose de ellos para los planes que abriga".<sup>10625</sup> Por último, si bien el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los militares, ser elegidos Diputados; las leyes orgánicas de la Marina y del Ejército limitaron a comienzos de siglo esa facultad constitucional.<sup>10626</sup>

La extorsión generalizada también estuvo vigente en las prácticas bancarias, e íntimamente ligada a los intereses políticos. Tal como lo denunciara Aristóbulo del Valle,<sup>10627</sup> esta realidad hizo que a poco de producida la Revolución del 90, el Presidente del Banco de la Provincia Carlos Casares dictara una resolución --semejante a las vigentes cuando la refundación del Banco en la década del cincuenta,<sup>10628</sup> y a las Circulares que habían emitido diez años antes, la Inspección General de Armas y el Ministerio de Instrucción Pública-- prohibiendo

"...a los Gerentes mezclarse en asuntos políticos y desempeñar puestos públicos provinciales, debiendo optar por estos o la Gerencia, por juzgarlos incompatibles".<sup>10629</sup>

Las impugnaciones de los gerentes de bancos se extendieron a la órbita municipal. En Mendoza, cuando los Cívicos le exigieron al Gobernador Rufino Ortega que el Gerente del Banco Nacional Alberto Beceyra renunciara a su banca o concejalía de la Municipalidad, Ortega alegó que dicha incompatibilidad no existía, "...por lo especial de

las funciones municipales, que no son de carácter político, ni ofrecen el carácter de un puesto o empleo, puesto que no son remunerados".<sup>10630</sup>

Por último, las impugnaciones de los gerentes de bancos que detentaban cargos políticos se extendieron en este siglo a la órbita privada. El que los Directores de Bancos privados, que ocupaban cargos legislativos, estuvieren presentes en las Comisiones que trataban temas de índole bancaria, fue puesto en tela de juicio durante la llamada década infame por un político conservador.<sup>10631</sup> Finalmente, debe aclararse que el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los profesores y los empleados de Banco, ser elegidos Diputados.

## **A-VII La práctica exacerbada del federalismo.**

La inercia con que en las provincias se practicaba un exacerbado federalismo tuvo que ser combatida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en uso del control de constitucionalidad gestó una numerosa jurisprudencia.<sup>10632</sup> Asimismo, la práctica del nepotismo, atentatorio de las incompatibilidades de sangre, de la división de poderes y de la periodicidad de los cargos públicos y por consiguiente del régimen republicano de gobierno y del principio de la circulación de las elites, era también notable. La elite burocrática central, consciente de la naturaleza endogámica o consanguínea de las elites políticas del interior comenzó a manipular el nepotismo o incompatibilidades de sangre como una estrategia de dominación.<sup>10633</sup> En ese sentido, Lohmann Villena (1974) fue el primero en elaborar una tipología de este comportamiento al distinguir un nepotismo lineal o dinástico, que no atravesaría la red de instituciones y partidos políticos; de otro transversal u horizontal, que sí atravesaría la red de casamatas burocráticas, partidos y facciones políticas y fronteras provinciales.<sup>10634</sup> El primer tipo de nepotismo sería el caracterizado por Botana (1977), quien se limitó sólo a acumular los apellidos que se repiten y en adjuntar actores con el mismo apellido que desempeñaron los cargos de gobernador, senador nacional, ministro o diputado nacional.<sup>10635</sup> El segundo tipo de nepotismo sería el descrito por Lewin (1979), quien analizó el caso del nordeste Brasileño. Para esta autora la estrategia predominante para copar el aparato de un estado oligárquico consistía en producir coaliciones políticas con cuñados o futuros cuñados.<sup>10636</sup> Converse (1969) agrega que el compromiso político-partidario se suele heredar de padres a hijos y nietos en lo que se denominaría una transmisión intergeneracional de compromisos partidarios.<sup>10637</sup> Es así que Converse (1969) introduce el concepto del ciclo de vida familiar del compromiso político,<sup>10638</sup> y Laband y Lentz (1985) el de la transferencia de riqueza intergeneracional entre políticos. En cuanto a la selección y reclutamiento de los cuadros políticos de la oligarquía o república corrupta, Graciarena (1978) puso énfasis en los criterios de linaje,<sup>10639</sup> y sucesión dinástica.<sup>10640</sup> Según Graciarena, los clanes, la llamada "parentela", las familias, las dinastías, o el patriciado, deben ocupar el centro del análisis y no el estado, las elites, o el modo de producción.

En conclusión, las superposiciones de funciones a que eran proclives los miembros de la elite política de las provincias argentinas a fines del siglo pasado justifican plenamente las objeciones que Etzioni-Halevy (1994) puso a las tesis de Higley, Burton y Field (1990), y a las de Higley y Gunther (1992). Asimismo, el regionalismo a que eran adictas dichas elites, expuesto claramente por Gibson (1996), obstaculizó permanentemente la gestación de partidos políticos orgánicos a nivel nacional.

## Capítulo V-A-2: Segregacionismo en la educación secundaria

### Índice

- B-I Tradición historiográfica en materia de crisis educativa
- B-II Extorsión a la que estaban sujetos aquellos docentes que detentaban otros cargos en el aparato del estado.
- B-III Instrumentación de la cátedra para el favoritismo y la discriminación política.
- B-IV.- Estado de descomposición de la Enseñanza Secundaria.
- B-V.- Implicancias cuantitativas y cualitativas.

### Introducción al capítulo V-A-2:

En materia educativa cabe preguntarse si la innovación de introducir la educación secundaria a través de los Colegios Nacionales fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de una modernidad absolutista, aún inconclusa, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>10641</sup> La aparición de la república moderna hizo necesario contemplar entonces la influencia de la educación en el periodismo político y a partir de este último, su influencia en las luchas judiciales y parlamentarias, así como la independencia de ambos del poder ejecutivo del Estado.<sup>10642</sup> Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades docentes.

En la diferenciación de funciones del estado moderno, analizamos en este trabajo la función educativa, en especial la correspondiente a la llamada educación media. En ella nos detenemos en el rol de las cátedras y los rectorados de los Colegios Nacionales, en su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política; en la extorsión a la que estaban sujetos aquellos docentes que detentaban otros cargos en el aparato del estado; y en su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno. Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,<sup>10643</sup> del que nos habla Carmagnani (1988), seleccionando numerosos textos de época hallados en la correspondencia presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, así como en la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. El Apéndice C nos revela la información familiar y burocrática de profesores y rectores con sus apellidos maternos así como el de sus respectivas esposas y los cargos políticos detentados.

La lenta gestación de la esfera pública en el mundo moderno fue dando lugar a la constitución de lo que se ha dado en llamar la República de las letras. La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>10644</sup> La aparición de los Colegios Nacionales en la panoplia de la república moderna hizo necesario contemplar entonces sus relaciones con la burocracia eclesiástica y los otros fragmentos de la burocracia civil; la influencia de la docencia en el periodismo

político y a partir de este último, su influencia en la lucha parlamentaria, así como su independencia de los otros poderes del Estado. En dicho esquema, las incompatibilidades académico-docentes entraron a ocupar un lugar crucial.<sup>10645</sup> El que los Rectores o Presidentes de Universidades, ocuparen cargos políticos como el de Senador o Diputado, fue puesto en tela de juicio en 1883 con respecto al Dr. Nicolás Avellaneda;<sup>10646</sup> y en 1886 con referencia al Dr. Amancio Alcorta.<sup>10647</sup> Recién a partir de la Reforma Universitaria de 1918 las incompatibilidades académico-docentes entraron a provocar escándalo.<sup>10648</sup> En 1924 el Diputado Nacional Enrique Dickmann cuestionó duramente la incompatibilidad en que había incurrido en el pasado el Senador Nacional Joaquín V. González;<sup>10649</sup> y en la que incurría en ese momento el Dr. José Arce.<sup>10650</sup>

En este trabajo, me atrevería a postular la tesis de que los permanentes realineamientos docentes ocurrían debido a una tensión fundamental entre los avanzados sistemas políticos y los atrasados sistemas pedagógicos, que por motivos locales (tradiciones históricas autoritarias, raciales y religiosas) se resistían al cambio y a la adaptación.

## **B-I Tradición historiográfica en materia de crisis educativa**

Entre las preocupaciones teóricas de los científicos sociales del mundo siempre figuró con preeminencia la vinculación entre la intelectualidad y las estructuras políticas, sociales y económicas. Para la tesis liberal, personificada en el siglo XVIII en Jeremy Bentham y Nicole Condorcet, la educación tuvo el mérito de divulgar el conocimiento, el cual permitió combatir el dogmatismo y la intolerancia y lograr el consiguiente tránsito de plebe a pueblo.<sup>10651</sup> Para esta tesis, la educación no tenía por objeto transformar la estructura social sino más bien reproducirla.<sup>10652</sup> En esta tarea, la educación media o secundaria tenía por destinataria a la élite dirigente, y la educación primaria a las clases populares.<sup>10653</sup> Más tarde, para el Romanticismo, y en especial para los Socialistas utópicos, la educación tuvo por meta transformar el mundo, incluidas las estructuras sociales, políticas y económicas.<sup>10654</sup> Sin embargo, para el Marxismo, las estructuras educativas (colegios, universidades, etc.) siguieron siendo meros instrumentos de las clases dominantes.

Al contribuir la educación a la creación de un consenso susceptible de afianzar la estabilidad política desafió a la institución tradicionalmente responsable de ejercer dicha tarea (la Iglesia).<sup>10655</sup> En la primer post-guerra, en un intento por refutar al Marxismo, Weber sobrevaluó la capacidad de las instituciones educativas para cambiar el statu quo, proveyendo de cuadros para la constitución del aparato burocrático, y subestimó el grado en que eran meros instrumentos para su reproducción.<sup>10656</sup> Y en la última post-guerra, el Estructural-Funcionalismo, representado por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, sostuvo que la educación, conjuntamente con las demás instituciones de la democracia liberal, proveía el necesario apoyo para el equilibrio del sistema.<sup>10657</sup>

Para esta escuela de pensamiento, el impacto de la educación en el pasado político de las repúblicas occidentales estaría ligado con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de los modelos pedagógicos del creacionismo bíblico [Cuvier] versus el naciente evolucionismo positivista). Sin embargo, según Barman y Barman (1976), en su estudio sobre el Brasil imperial, el desequilibrio de los sistemas políticos fueron alimentados por el sistema educativo, más precisamente, por el incremento en la

producción de graduados universitarios, que superó el número de posiciones de elite disponibles, y resultó en una devaluación de su capital simbólico, expresado en sus credenciales académicas, a la par que la perpetuidad en las posiciones de poder por parte del grupo dominante original bloqueaba toda posibilidad de ascenso. Finalmente, para la teoría general de sistemas, representada últimamente por Morin (1992), las instituciones políticas --como las educativas-- son meras instancias, cambiables y transitorias, de redes de relaciones más extensas y fundamentales.<sup>10658</sup>

En la Argentina, autores como Caballero (1910), Sagarna (1943), Torrassa (1957), Lanzilloto (1973) y Argacha (1979) encararon el estudio de la educación con el criterio liberal clásico. Autores como Spalding (1972), Tedesco (1982) y Hodge (1987) volcaron sus preocupaciones sobre aspectos más generales del proceso educativo. Pero lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dió en ese entonces entre el régimen educativo por un lado y los regímenes electorales, judiciales y comunicacionales por el otro.<sup>10659</sup> En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de la escolarización y los textos educativos, tal como lo hicieran Quattrochi (1987, 1992) y Svampa (1994), sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron del comportamiento de las autoridades docentes (rectores) y del cuerpo docente en particular.<sup>10660</sup>

## **B-II La extorsión a la que estaban sujetos aquellos docentes que detentaban otros cargos en el aparato del estado.**

La plana mayor del cuerpo docente de los Colegios Nacionales era renovada anualmente por decreto, con lo cual se los exponía a una suerte de extorsión.<sup>10661</sup> Los profesores que paralelamente detentaban un cargo público (ya sea en un Colegio Nacional, en el Banco, en la Justicia, o en el Correo), eran los más expuestos a la extorsión practicada por los poderes públicos.<sup>10662</sup> Y los que paralelamente ejercían el periodismo político eran también los más expuestos al chantaje practicado por el poder. Esto hizo que el Ministro de Instrucción Pública diera a luz en Enero del 80 --al igual que lo hiciera la Inspección General de Armas en el Ejército-- una Circular "...prohibiendo a los empleados de los Colegios Nacionales tomar parte en la política local".<sup>10663</sup> Asimismo, en los planes del Gobierno estaba presente una ley dictada en 1880 que prohibía la acumulación de empleos nacionales y la retención de cátedras sin servir las por parte de los Legisladores nacionales. Desde Córdoba, a propósito de la retención de cátedras, el Gobernador Antonio del Viso le escribía a J. Roca informándole que "...hablé con el Dr. Avellaneda [para] que se tome una resolución al respecto. Es esto necesario y moralizador".<sup>10664</sup> Cinco años más tarde, en 1883, el nuevo Estatuto Universitario prohibía, en su artículo 31, la acumulación de más de un ramo de enseñanza en un sólo profesor.<sup>10665</sup> En Salta, el ex-Juez de Primera Instancia Dr. José Benjamín Dávalos detentaba tres cátedras, las de Filosofía, Literatura e Historia y padecía por ello, en opinión del Dr. Abrahám Echazú, de una "incompatibilidad segura".<sup>10666</sup> Para dichas cátedras se postulaba el Dr. Echazú, aduciendo en su respaldo de una preparación especial, pues

"...en un país en el que no hay teatros ni centro alguno de diversión, las largas horas de las noches las acorto con lecturas de libros sobre ciencias sociales, que son las que armonizan con nuestra carrera".<sup>10667</sup>

Finalmente, debe aclararse que el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los profesores, ser elegidos Diputados.

En la opción entre una cátedra universitaria y un puesto de Juez Federal o Ministro, generalmente triunfaban los últimos. El Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Nataniel Morcillo, se ofrecía a Roca para cubrir la vacante que prometía el enjuiciamiento del Dr. Jerónimo Clara,<sup>10668</sup>

"...pues en ese puesto me creo tan competente o más que el Dr. [Eusebio] García, y dejaría para otro la cátedra de Derecho Civil que se me ha confiado".<sup>10669</sup>

Y el Dr. Martín G. Güemes, por haber aceptado en 1881 el Ministerio de Gobierno de Salta "...ha dejado la cátedra de Filosofía que desempeñaba en aquel Colegio".<sup>10670</sup>

### **B-III La instrumentación de la cátedra para el favoritismo y la discriminación política.**

El grado de confusión de funciones y lo endeble de la libertad de cátedra vigente en los Colegios Nacionales se manifestaba con más rigor en ocasiones en que la titularidad de la misma recaía en un político o periodista opositor. El Ministro de Instrucción Pública Dr. Osvaldo Magnasco recordaba en oportunidad del debate suscitado en la Cámara de Diputados con motivo de la Reforma de la enseñanza secundaria que Alberdi, parafraseando a Adam Smith, sostenía que la instrucción "...ha sido un medio de reclutaje y de enrolamiento político, una máquina electoral".<sup>10671</sup> Amén del Jefe de la Frontera, también el Rectorado del Colegio, los Senadores Nacionales, el Juzgado Federal, y la Aduana Nacional, eran para el ex-Diputado Nacional Francisco J. Ortiz, lo que para Gramsci la extensa red de trincheras y casamatas de la sociedad civil,

"...otros tantos castillejos desde nos hacen fuego cuando se presenta la ocasión, porque todos estos empleos les pertenecen hoy y es necesario irlos desalojando poco a poco de estas posiciones que han atrapado durante el gobierno de Sarmiento y de las que se valen sin miramiento alguno para sus fines políticos".<sup>10672</sup>

En San Juan, para Caballero (1910), seudónimo del periodista Pedro P. Calderón,<sup>10673</sup> desde 1864 reinaba el curanderismo pedagógico, pues

"...no se ha atendido el juicio de Rectores y Directores en la designación del profesorado, sino a las influencias nocivas [políticas], que han menoscabado el buen nombre de esas instituciones".<sup>10674</sup>

Quince años más tarde, en 1879, el Dr. Segundo Benavídez fué despojado de su cátedra por el Ministro de Culto e Instrucción Pública Dr. Saturnino María Laspiur, en beneficio de Segundino Navarro, "Nacionalista y como hijo de Laspiur".<sup>10675</sup> A los tres años, el Rector Saturnino Aráoz, enrolado en la oposición a la política de Agustín Gómez y Anacleto Gil, elimina del cuerpo docente del Colegio a Juan Pablo Albarracín y Nataniel Morcillo.<sup>10676</sup> Con esta actitud, Aráoz se había granjeado el desprecio y la mofa del resto del claustro.<sup>10677</sup> Para evitar esta continua pérdida de autoridad del Rector, Igarzábal le recomendaba a Roca "...separar inmediatamente a Tristán Ríos, creo que esto moralizará a los demás".<sup>10678</sup> Y un año después, el Senador Nacional Rafael Igarzábal le indicaba a Roca que "...pronto me permitiré indicarle personas que con ventajas reemplazarían en el

Colegio Nacional a nuestros tres enemigos Cavalli, Chávez y Zavalla".<sup>10679</sup> En San Luis, los Profesores Felipe S. Velázquez y José Parellada, docentes del Colegio Nacional "Juan Crisóstomo Lafinur" y de la Escuela Normal de Maestras, fueron separados de sus respectivas cátedras debido a su militancia opositora.<sup>10680</sup> Desde Mendoza, el Gobernador Rufino Ortega le informaba a Roca que el Dr. Lemos, Profesor de Historia Natural, "...era enemigo declarado del Gobierno de la Nación y del de esta Provincia", no así los jóvenes Tiburcio Benegas y Leopoldo Díaz, quienes tenían el peso de la administración, dirección y redacción de La Palabra.<sup>10681</sup> Las ideas del Dr. Lemos, contrarias al gobierno

"...las ha hecho conocer bien claramente en el Ferrocarril,<sup>10682</sup> diario que en sus columnas hace fuego a todo lo que hoy existe y que puede considerarse órgano de oposición".<sup>10683</sup>

Y cinco años después, el Gobernador Oseas Guiñazú le escribía al Presidente Juárez Celman que "...hace varios días que he escrito a Cárcano y al Dr. Villanueva indicándoles la necesidad de separar de sus puestos a los profesores Aguirre y Villars".<sup>10684</sup> A Guiñazú le constaba que estos profesores "...instigaron a sus alumnos produciendo aquellos desórdenes de silvidos, pedradas, etc. sucedidos cuando [en vísperas de la Revolución del 90] llegó el Gobernador de Córdoba [Marcos Juárez]".<sup>10685</sup>

En Córdoba, el Rector del Colegio de Monserrat Dr. Filemón Posse hostigaba al Prof. R. P. Pascual Soprano, privándolo primero de su clase de griego,<sup>10686</sup> para finalmente echarlo del Colegio "...diciéndome que si no saliese inmediatamente me haría echar a patadas por los sirvientes".<sup>10687</sup> Aparentemente esta actitud le valió a Posse el traslado a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital.<sup>10688</sup> En Salta, la separación del Colegio Nacional del ex-Diputado Nacional Sidney Tamayo,<sup>10689</sup> de filiación Irigoyenista, fue obra --según el Ministro Eduardo Wilde y el ex-Subsecretario de Marina y entonces Director General de Correos y Telégrafos Olegario Ojeda-- del entonces Senador Nacional Dr. Francisco J. Ortiz, quien

"...pidió la nómina de profesores del Colegio Nacional de Salta y borró a Tamayo, a pesar de que [Olegario] Ojeda le observó que era un buen profesor".<sup>10690</sup>

Y el Dr. Eliseo Outes, prohombre también del partido Irigoyenista, y cuñado de Tamayo, en oportunidad de las elecciones presidenciales de 1886, "...temía perder el Rectorado del Colegio Nacional".<sup>10691</sup> En Catamarca, en 1880, los Profesores del Colegio Nacional conjuntamente con Lisandro Olmos y el Dr. Leiva, quienes conspiraban contra las autoridades provinciales, salieron a recibir al Coronel Hilario Lagos,<sup>10692</sup> y a un Sargento Mayor Torres, "...que viene en su compañía con el apellido supuesto de Doll y también Sotomayor Inspector Nacional...alojándolos en casa del Profesor del Colegio Don Belisario Ahumada".<sup>10693</sup> Y tres años después, en 1883, la mayoría del cuerpo docente, a juicio del Gobernador Joaquín Acuña, pertenecía

"...a la oposición que mi Gobierno sufre y que están agrupados en Club Político llamado "Asociación Católica", manejada desde Buenos Aires por Achával, Goyena, Estrada, etc. Estos mismos individuos son los que acompañados del clero se preparan para luchar a mi suegro [Gral. Octaviano Navarro] en las próximas elecciones".<sup>10694</sup>

Y dos años después, el ex-Diputado Nacional Manuel V. Rodríguez conjuntamente con el ex-Senador Nacional Gregorio Moreno y el Dr. Adolfo Castellanos, al no lograr un cambio

en el personal docente del Colegio Nacional, principiaron "...a hacer una atmósfera desagradable al Sr. [Gobernador José S.] Daza presentándolo como enemigo de la oposición y principalmente del clero".<sup>10695</sup>

En La Rioja, en 1884, el Coronel Nicolás Barros aliado al ex-Gobernador Francisco Vicente Bustos "...han organizado un club bajo la base exclusiva del Colegio Nacional y sostenido por el Subsecretario del Ministro de Justicia Don Florentín Barros, hijo de Barros".<sup>10696</sup> Este club, a juicio de Mardoqueo Molina,<sup>10697</sup> "...hace propaganda de una adhesión ciega a la política del Presidente y combate duramente al Gobierno [de Jamín Ocampo], que lo apoya el pueblo en masa llamándolo Rochista".<sup>10698</sup> Dos años después, en 1886, con motivo del pedido de destitución de cinco profesores del Colegio Nacional, en oportunidad de las elecciones presidenciales, el Coronel Barros le informaba al nuevo Presidente Juárez Celman que

"...esos profesores eran exclusivamente opositores a [Francisco Vicente] Bustos y que al tachárseles deslealmente de Rochistas, se procuraba en el fondo, obtener del gobierno un acto de protección directa en favor de Bustos, convirtiendo a los cesantes en verdaderos enemigos de la causa de Vd.". <sup>10699</sup>

En Córdoba, el periodista Ignacio Vélez,<sup>10700</sup> como redactor de El Eco de Córdoba, fué siempre respetuoso del Ministro de Instrucción Pública, por temer perder sus cátedras en el Colegio de Monserrat y en la Universidad de Córdoba, pero cuando dicho Ministro dejó su puesto, el El Eco de Córdoba osó decir, como recuerda Onésimo Leguizamón, "...que el Ministro había prostituido los Colegios llevando a su seno ateos y masones".<sup>10701</sup> Y en Santiago del Estero, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le pedía al Presidente Roca en 1883 que "...no comprometa las cátedras que quedan vacantes en el Colegio Nacional de Santiago pues tengo muchos compromisos",<sup>10702</sup> para más tarde adjuntarle, en Enero de 1885, la lista de sus candidatos favoritos, previniéndole

"...que sólo pido la separación de dos o tres profesores que son nuestros enemigos para sustituirlos por amigos que nos ayudan y es necesario colocarlos en esos puestos". <sup>10703</sup>

Un año más tarde, y ya instalado el nuevo Presidente, el Ministro de Instrucción Pública, Eduardo Wilde, le informaba al Presidente Juárez Celman que

"...nuestro amigo [Absalón] Rojas quedará bien satisfecho pues así en el Colegio Nacional como en la Escuela Normal, todos los puestos que había disponibles han sido llenados con recomendados suyos exclusivamente". <sup>10704</sup>

En Jujuy, según el ex-Senador Nacional Segundo Linares, el Dr. Francisco Costas había establecido que los Rochistas no debían aparecer como Rochistas,

"...porque les quitarían los puestos que tenían en el Colegio Nacional, pero que en un momento dado se presentarían más Católicos que el Papa". <sup>10705</sup>

Y cinco años antes, en 1880, el Profesor del Colegio Nacional, Dr. Teodosio Temístocles Carrizo,<sup>10706</sup> sufrió a manos de los secuaces del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante el peor de los castigos pues se encontraba "...en cama con diez o doce puñaladas, que representan la tiranía oficial de Jujuy". <sup>10707</sup>

También la arbitrariedad se extendía a la Administración de las Escuelas Normales de Mujeres. Luis del Carril denunciaba a Roca desde Milán,<sup>10708</sup> que el Dr. Wilde acababa de cometer en San Juan, "...el acto más injusto nada menos que con la madre de Alejandro Carril mi primo [María Villarino de Carril], que desempeñaba el puesto de Rector de la Escuela Normal".<sup>10709</sup> María Villarino era nieta e hija de educacionistas, pues su Sra. Madre era "...la célebre y renombrada Manuela Cabezón de Villarino, a quien le debe Chile la educación de la mujer en casi una jeneración".<sup>10710</sup> Al lado de su madre, Doña María Villarino

"...se crió y aprendió a dirigir los colegios a la que con toda crueldad acaba de destituir Wilde obedeciendo a una de esas intrigas que en San Juan con tanta frecuencia y maldad se urden".<sup>10711</sup>

A fines de ese mismo año, el Senador Rafael Igarzábal dijo en San Juan "...que vá a hacer hechar a las cinco maestras norte-americanas que están en la Escuela Normal porque son irreligiosas, que mejores son las maestras del país".<sup>10712</sup> En La Rioja, la maestra Norteamericana Alrrette Haven denunciaba en la Memoria Ministerial de 1884 que las autoridades de la Iglesia Católica habían prohibido a los católicos concurrir a la Escuela Normal de La Rioja.<sup>10713</sup> Y en Córdoba, la fundación de la Escuela Normal de Mujeres de Córdoba estuvo estrechamente ligada con la persecución clerical pues fue necesaria

"...una campaña en favor de las maestras norte-americanas y mandando nuestras hijas a la escuela, haciéndonos sordos hasta a los groseros insultos que se nos dirigen en la calle, por católicos fervientes".<sup>10714</sup>

Pero también los Colegios Nacionales servían de tribuna política a la oposición, ya fuere local o nacional. En Tucumán, a pesar de la cordial armonía que reinaba entre los Gobiernos Nacional y Provincial, el Gobernador Miguel M. Nougués le confiaba al Presidente Roca, en 1881, que el Colegio Nacional, dirigido por el Rector José Posse, (a) "Pepe", era

"...el único asilo de una oposición ciega, sostenida no en nombre de principios sino solo de pasiones mezquinas, oposición que no tiene otro fin que combatir y tratar de destruir la situación actual".<sup>10715</sup>

En La Rioja, el Colegio Nacional había jugado, a juicio del Diputado Nacional rochista Guillermo San Román, "...un rol muy importante en esta elección".<sup>10716</sup> Era público y notorio, "...que todo el personal docente o al menos sus dos terceras partes, salió a campaña: al frente de gendarmes de policía unos profesores, y otros, al frente de soldados de línea".<sup>10717</sup> Y en Catamarca, el entonces ex-Diputado Nacional Miguel M. Nougués le confiaba a Roca que los enemigos del Dr. Fidel Castro

"...trabajan cuanto pueden por la separación de él [Castro] del Rectorado del Colegio Nacional lo que no han podido conseguir del Presidente Avellaneda, que es amigo particular de éste".<sup>10718</sup>

Durante su gestión como Rector, Castro separó a Profesores como el Dr. Francisco Latzina, catedrático de matemáticas superiores y encargado de observaciones meteorológicas en la Escuela de Minas,<sup>10719</sup>

"...distinguido Profesor hoy de la Academia de Ciencias de Córdoba, y ahora pocos días el más distinguido y antiguo Profesor el Dr. Marcos A. Figueroa, para reemplazarlo por el crapuloso !!!Simón Avellaneda!!! Secretario del Interventor de La Rioja Dr. Quiroga".<sup>10720</sup>

Pero dos años más tarde, en 1881, Castro fue destituido por haber tomado parte en "...la última crisis política que afligió a la República, en la que él y sus profesores tomaron parte activa contra los gobiernos nacionales y provinciales".<sup>10721</sup> Tres años después, en 1885, la misión presidida por el ex-Gobernador de Salta Dr. Benjamín Zorrilla, al quitarle a Francisco Caracciolo Figueroa el predominio político de la provincia, "...hizo retirar del Colegio Nacional a mis amigos".<sup>10722</sup> Y veinte años más tarde, en 1905, se separaba nuevamente del Rectorado del Colegio Nacional de Catamarca al Dr. Castro,

"...nombrando en su reemplazo a D. Adolfo Castellanos, cuñado del Senador Julio Herrera González, separándose igualmente en Chumbicha al Dr. Calavechia, Jefe de la Estación Experimental".<sup>10723</sup>

#### **B-IV.- Estado de descomposición de la Enseñanza Secundaria.**

Pero en general en todas las provincias, y en especial en Salta como en Santiago del Estero, los Colegios Nacionales se hallaban en un estado de descomposición, por la ineptitud e ignorancia de sus Rectores. En Salta, según Francisco J. Ortiz, el Rector, que era el Dr. José Benjamín Dávalos, "...es un hombre valetudinario y paralítico, física y moralmente".<sup>10724</sup> Al organizar el personal del Colegio, Ortiz suponía que "...espurgarán un poco ese cuerpo docente, que en su mayoría es incompetente".<sup>10725</sup> Y en 1885, al quedar vacante la cátedra de Física que detentaba Benjamín A. Dávalos, el periodista Mariano Gorostiaga,<sup>10726</sup> le recomendaba a Juárez Celman la persona de "...nuestro amigo el Dr. Juan P. Arias, uno de sus más decididos partidarios".<sup>10727</sup> Asimismo, le advertía que el entonces Diputado Nacional, Dr. Sidney Tamayo, amigo personal del Ministro Wilde,

"...trabaja para reemplazar a Dávalos y dada la circunstancia de ser Irigoyenista, su nombramiento vendría a demostrar que no obstante ser Juarista el Dr. Wilde, nuestras recomendaciones no tienen valor".<sup>10728</sup>

En Rosario, La Patria Argentina advertía que al Rector del Colegio Nacional,

"...encargado por el gobierno del Gral. Roca de dirigir la educación de la juventud rosarina se le ha visto tirado en media calle en completo estado de ebriedad y embrutecimiento y sirviendo de befa a una cantidad de changadores que estaban estacionados en una esquina próxima".<sup>10729</sup>

En San Luis, en 1881, para el periodista Joaquín Carlés, director y redactor de El Oasis, el Rector R. P. Mauboussin

"...me hace su perpetua guerra de chismes y malquerencias, explotando la apariiencia de su hábito y mis rencillas periodísticas en pro de su sostenimiento en el Colegio, cuyo profesorado en masa se ha negado a defenderlo".<sup>10730</sup>

El R. P. Mauboussin

"...puebla una quinta suya, y hace figurar a uno de sus peones como ayudante de química, y él mismo que se hizo clérigo con los bienes de su querida en San Juan que era una viuda vieja y fea, convierte el Colegio en un burdel, llena de chismes y enredos toda la ciudad, y dos días antes de venirse a Buenos Aires es pillado con una penitente de 50 años, en casa ajena in fraganti delictu".<sup>10731</sup>

Para sustituirlo, el candidato ha sido el actual Vice-Rector, el fraile Carreras, (a) "Escapes", quien "...no tiene en el género clasificación posible, porque es un bulto, una bolsa de sebo".<sup>10732</sup> Si bien Carreras es profesor de latín y griego, "...del latín no conseguí que alcanzase a conjugar; y del griego no pude hacerle distinguir la omega".<sup>10733</sup> En Tucumán, en 1877, el que luego fuera Diputado Nacional Benjamín Posse, a propósito de la actuación docente del Fraile Domínico Angel María Boisdron, planteó la incompatibilidad de los sacerdotes para enseñar Filosofía o Historia en los Colegios Nacionales.<sup>10734</sup> Y tres años después, en Santiago del Estero, a juicio del Diputado Nacional Pedro Vieyra,<sup>10735</sup> hace tiempo "...soportamos con pena y dolor al simple R.P. Piñero, que ha formado el cuerpo docente de este Colegio en su mayor parte de favoritos que ni a enseñar a leer saben";<sup>10736</sup> y en opinión del P. Soprano ha hecho del Colegio de Santiago "...el castillo y guarida de su partido bajo el amparo de [Juan María] Gutiérrez y [Saturnino] Laspiur".<sup>10737</sup>

#### **B-V.- Implicancias cuantitativas y cualitativas.**

Finalmente, es preciso tener en cuenta para tener una idea del alcance geográfico y cuantitativo que la educación media tenía en el contorno del país, que para 1864 se habían fundado en el interior del país, un total de cinco Colegios (en Mendoza, San Juan, Tucumán, Catamarca y Salta); y tres años después, para 1871, casi triplicó el número a trece Colegios y una matrícula de 2.385 alumnos, el doble de los registrados tres años antes, en 1868.<sup>10738</sup> En cuanto al contenido de los Planes de Estudio, este fué siempre una manzana de discordia. El Plan General de Estudios de 1863 fué modificado por el de 1870, y éste último por el de 1873, consistiendo fundamentalmente las reformas en la distinta duración de los planes de estudios.<sup>10739</sup> Recién una vez federalizada Buenos Aires, los contenidos de la educación fueron puestos en tela de juicio. Para el Juez Federal Pedro Olaechea y Alcorta, llamaba mucho la atención que el Ministro Eduardo Wilde, en su proyecto de Reforma del Plan de Estudios de los Colegios Nacionales, pensara "...suprimir la Economía Política y la Instrucción Cívica".<sup>10740</sup> En Santiago del Estero, el ex-Rector Eusebio García,<sup>10741</sup> elevó al Presidente en 1880 una nota denunciando el estado de atraso en que se encontraba el Colegio Nacional, "...en poder de un jesuita oscurantista, ignorante y farsante".<sup>10742</sup> El Canónigo Piñeiro había practicado, según García, un auto de fe de los libros de ciencia y filosofía moderna que el propio García había donado a la biblioteca del Colegio durante su anterior gestión como Rector y Vice-Rector, en reemplazo de su suegro.<sup>10743</sup> Finalmente, el Plan de Estudios fue dictado el 23 de Febrero de 1884,<sup>10744</sup> para ser nuevamente reformado una vez producida la Revolución del 90.<sup>10745</sup> Es interesante observar que para esa época, las bibliotecas registran la presencia de los libros de Roda (1874 y 1883), acerca de las virtudes de la oratoria.

Por último, podemos concluir que la conculcación de la libertad de cátedra y los niveles de corrupción en los ambientes educativos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas del caudillismo y el militarismo, heredados de la anarquía y las guerras civiles, aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

## Capítulo V-A-3: **Empastelamiento de imprentas y chantajes en el periodismo**

### **Índice**

- C-I Tradición historiográfica en materia de decadencia periodística
- C-II Comportamientos frente a prácticas corruptas.
- C-III Censura y auto-censura.
- C-IV Persecución, empastelamiento de imprentas y extorsión.
- C-V Calumnias y duelos.
- C-VI Fuentes de financiación, información y mano de obra especializada (operarios).
- C-VII Prácticas desleales en el periodismo.
- C-VIII Redes telegráficas y ferroviarias.

### **Introducción al capítulo V-A-3:**

En materia comunicacional cabe preguntarse si la innovación del periodismo en la Argentina decimonónica fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de una modernidad colonial-absolutista, aún inconclusa, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>10746</sup> Por ende, la aparición de la república moderna hizo necesario contemplar la influencia del periodismo político en las luchas electorales, educativas, judiciales y parlamentarias.<sup>10747</sup>

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los órganos periodísticos, tal como lo hicieran para determinados periódicos Argentinos numerosos autores,<sup>10748</sup> sino que hemos pretendido, tratando de seguir las sugerencias de Bourdieu, Chartier y Morin, incursionar en un análisis de las reacciones que diferentes políticos y funcionarios tuvieron del comportamiento del periodismo en particular. Específicamente, las desviaciones, desajustes o involuciones respecto a los valores de la prensa liberal e independiente (prácticas corruptas, censura y auto-censura, persecución y extorsión, calumnias, amenazas, atentados y duelos), su rol movilizador de la conciencia colectiva, así como las fuentes de financiación, información y mano de obra especializada (operarios), y las redes telegráficas y ferroviarias.<sup>10749</sup>

Para este trabajo, hemos aplicado el análisis sistémico que nos propone Morin y el intersticial o residual,<sup>10750</sup> del que nos habla Carmagnani (1988), seleccionando temáticamente numerosos textos de época hallados en la correspondencia que numerosos políticos (en ejercicio de Ministerios, gobernaciones y bancas parlamentarias) mantuvieron con Presidentes, Gobernadores y Ministros de la República, tales como Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, así como con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha.<sup>10751</sup> El Apéndice P nos revela la información familiar y

burocrática de periodistas y corresponsales con sus apellidos maternos así como el de sus respectivas esposas y los cargos políticos detentados.

## **C-I Tradición historiográfica en materia de decadencia periodística**

La lenta gestación de la esfera pública en el mundo moderno fue dando lugar a la constitución de lo que se ha dado en llamar el cuarto o el quinto poder.<sup>10752</sup> La aparición de este último en la panoplia del republicanismo moderno hizo necesario contemplar sus relaciones con la burocracia civil, eclesiástica y militar; y su independencia de los otros tres poderes del Estado. Para la consecución de una república democrática, la prensa libre y las libertades de información, expresión escrita e impresión, eran consideradas en aquél entonces, a juicio de Duncan (1980) y de Pacheco (1994), como instrumentos más profundos y fundamentales que la libertad de una tribuna callejera o una elección libre.<sup>10753</sup>

En ese sentido, la independencia política de un periodista constituía un valor sagrado. Para el jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, la libertad de imprenta debía considerársela como "...una ampliación del sistema representativo o como una explicación de los derechos que quedan al pueblo después que ha elegido a sus representantes. Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. El pueblo puede conservar y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes".<sup>10754</sup> Y para McEvoy (1994), analizando el caso Peruano, el periodismo se convirtió en la edad moderna en el medio de lucha no violento más idóneo para promover las campañas electorales con las cuales consolidar las situaciones provinciales.<sup>10755</sup>

De ahí que la vinculación entre la intelectualidad y la estructura política, social y económica ha sido siempre materia de preocupaciones teóricas entre los científicos sociales del mundo. Para la tesis liberal, personificada en el siglo XIX en Ugo Foscolo y Emile Hatín, el periodismo tuvo el mérito de divulgar el conocimiento, el cual permitió combatir el dogmatismo y la intolerancia, e iniciar las discusiones políticas que alimentaron la conciencia pública acerca de las libertades y los derechos humanos y las consiguientes transiciones de la plebe a pueblo y del vasallo a ciudadano.<sup>10756</sup> Al contribuir el periodismo a la creación de un consenso susceptible de afianzar la estabilidad política desafió a las instituciones tradicionalmente responsables de ejercer dichas funciones (la Iglesia, la escuela y los tribunales).<sup>10757</sup>

Más tarde, para el Marxismo, las estructuras periodísticas (revistas, diarios, imprentas, agencias de cables y noticias, etc.) fueron siempre meros instrumentos de las clases opresoras o dominantes. En la última post-guerra, el Estructural-Funcionalismo, representado por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, sostuvo que el periodismo conjuntamente con las demás instituciones de la democracia liberal proveía el necesario apoyo para el equilibrio del sistema.<sup>10758</sup> Para esta escuela de pensamiento, el impacto del periodismo durante el pasado político del republicanismo occidental estaría ligado con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de la censura eclesiástica versus el naciente dogma de la libertad de prensa). Para una visión post-moderna, existió una transición de una concepción artesanal del periodismo a una concepción de empresa en gran escala de producción de opiniones políticas.<sup>10759</sup> Finalmente, para la teoría general de sistemas, representada últimamente por Morin (1992), las instituciones políticas --como el

periodismo-- son meras instancias o eslabones, cambiables y transitorias, de redes de relaciones más extensas y fundamentales.<sup>10760</sup> Y sin la implementación de las comunicaciones modernas (periodísticas, telegráficas, radiofónicas, televisivas), parafraseando a Luhmann (1995), es imposible "...crear cadenas complejas de poder en las burocracias políticas y administrativas, mucho menos el control democrático sobre el poder político".<sup>10761</sup> Pero lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre el periodismo y los mecanismos comunicacionales (telegrafía) por un lado y los regímenes electorales, judiciales y educativos por el otro.<sup>10762</sup>

## C-II El comportamiento frente a las prácticas corruptas.

La difusión de prácticas corruptas en los ámbitos periodísticos, con la consiguiente pérdida de independencia y espíritu crítico, tuvo su inmediato correlato en las prácticas políticas propiamente dichas. En Jujuy, a juicio del Gobernador Eugenio Tello, la prensa se transformó en "...una poderosa palanca que ha contribuido con eficacia a crear la actual situación".<sup>10763</sup> Y dos años más tarde, no obstante que el Gobernador J. M. Álvarez Prado, un Juarista, le había prometido al ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el periódico oficial *La Unión* guardaría silencio en la cuestión electoral,

"...patrocinaba abiertamente la candidatura Juárez, combatiendo la de Vd. [Rocha], [y] se destituía de la manera más injustificable a los empleados que habían firmado el acta Rochista..."<sup>10764</sup>

El periodismo político o periodismo de opinión era de este modo un campo de batalla o de fuerzas para las luchas políticas y las candidaturas partidarias. En Mendoza, a diferencia de "*El Constitucional*",<sup>10765</sup> --que apoyó en 1873 la candidatura de Francisco Civit para Gobernador de Mendoza, contra la de Carlos González-- Lauro Galigniana Villanueva le advertía a Roca que no se fiara de la supuesta adhesión de los periódicos "*El Pueblo*",<sup>10766</sup> y "*El Artesano*",<sup>10767</sup>

"...porque no son más que periódicos quebristas para sostener y defender los intereses de los González,<sup>10768</sup> para que se queden estos con sus intereses dejando ignominiosamente en la calle a sus acreedores, pues para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".<sup>10769</sup>

En Corrientes, el Diputado Nacional Autonomista Manuel Derqui le informaba a Roca que desde un periodiquín titulado *Alto Paraná*,<sup>10770</sup> el ex-Ministro Severo Fernández, del gobierno de J. L. Madariaga,

"...célebre negociante a lo [Antonio] Gallino,...sólo consigue el ridículo, [pues] no quieren conformarse con que se les halla terminado lo que Vd. tan propiamente llama el saqueo de tierras".<sup>10771</sup>

A comienzos del siglo XX, en 1901, "*El Orden*",<sup>10772</sup> incitaba al pueblo Tucumano a manifestaciones públicas en favor del Dr. Benjamín Paz, quien procuraba

"...existir al calor de las parentelas, todos los entusiasmos de familia de aquel distinguido sujeto, pero con esto sólo consigue despertar viejos rencores de

filiaciones viejas, aunque ya felizmente se limitan, por la cultura adquirida, al repudio tranquilo de ese ciudadano para el cargo de senador".<sup>10773</sup>

Y en Entre Ríos, para asegurar el éxito de la candidatura del Dr. Leónidas Echagüe y el fracaso de la del Cnel. José Francisco Antelo, aparte de "**La Unión Entrerriana**",<sup>10774</sup> Juan A. Martínez le precisaba a Rocha con resignación que sería preciso que "...pudiésemos disponer de las columnas de algunos diarios de esa ciudad [Buenos Aires]", en especial de "**El Nacional**".<sup>10775</sup> Ambos "**El Demócrata**", partidario de Dardo Rocha,<sup>10776</sup> y "**El Argentino**",<sup>10777</sup> órgano católico, sostenido por el ex-Gobernador y entonces Senador Nacional Dr. Ramón Febre, colaboraron con Echagüe, pero por lo visto no bastaron para impedir el triunfo de Antelo. Cinco años más tarde, en 1883, la venida de Bartolomé Mitre y Vedia,<sup>10778</sup> fue, a juicio del Gral. Racedo, para

"...hacer trabajos políticos preparatorios para el porvenir...que principian por ahora con la fundación de un periódico que se llamará **La Idea**,<sup>10779</sup> redactado por Ruiz, Balleto y Marcos Funes".<sup>10780</sup>

En San Luis, el Gobernador Autonomista Rafael Cortés, apremiado en 1876 por el Gral. Roca para montar una empresa de periodismo político, le contesta "...que no hay aquí, de las personas de que puedo servirme alguna que sea suficientemente capaz de escribir como es necesario", para más luego convencerse de lo contrario y sacar "**El Telégrafo**".<sup>10781</sup> La oposición a Cortés estaba formada por el círculo de una publicación denominada "**El Puntano**".<sup>10782</sup> La lectura de esta publicación le revelaba a Cortés que "...no se trata de una oposición racional y elevada, sino de una oposición sistemada [sic], ruin y miserable",<sup>10783</sup> que en lugar de deshorrar su persona la honraba

"...porque es hecha por hombres degradados y sin aceptación, que mas que por todo, parece se hallan ligados por ciertas afinidades muy marcadas como la de haber sido enjuiciados criminalmente".<sup>10784</sup>

En San Juan, luego de arduas negociaciones con el redactor del desaparecido órgano "**La Tribuna de los Andes**",<sup>10785</sup> los Mitristas lograron hacerlo reaparecer, levantando en las elecciones de Gobernador, celebradas en abril de 1878, la "simpática" candidatura del ex-Representante por el distrito de Jáchal, Juan Crisóstomo Albarracín.<sup>10786</sup> Por el contrario, los Doncelistas o situacionistas conjuntamente con el partido Autonomista levantaron con éxito las candidaturas de Agustín Gómez y José Pedro Cortínez.<sup>10787</sup> Siendo bien recibido el triunfo de Gómez por los Mitristas, el único que le hizo oposición al gobierno de Gómez fué el periódico de Don Desiderio Bravo.<sup>10788</sup>

En Tucumán, el diario "**La Democracia**",<sup>10789</sup> fundado por los ex-Diputados Nacionales Silvano Bores y Zenón Santillán,<sup>10790</sup> al lanzar al público la cuestión de las candidaturas a la Gobernación, castigó en vano en 1895 el pasado político del amigo de Roca, Don Lucas Córdoba "...por mi Nacionalismo [Mitrista] del 74 y del 80".<sup>10791</sup> Y en Corrientes, en 1884, y ya con el Dr. Derqui de Gobernador, su Ministro de Gobierno, el Dr. Eugenio F. Ramírez,<sup>10792</sup> le prometía en el mes de Mayo al Ministro de Hacienda de la Nación Victorino de la Plaza empezar la propaganda para su candidatura a Presidente de la República "...por medio de mi diario **El Guaraní**,<sup>10793</sup> y mi periódico **La Verdad**".<sup>10794</sup> Cuatro meses más tarde, Rodolfo Alurralde le hacía saber a Victorino de la Plaza, que **La Verdad** "...no se publica mas porque el Gobierno la mandó cerrar".<sup>10795</sup> Simultáneamente, los del Gobierno, por otra Imprenta "...mandaron dar con el mismo nombre del que le mandaron cerrar".<sup>10796</sup> Contando entonces con la amistad del editor del diario del

Gobierno, Alurralde le mandó diarios de la capital para que transcribiese diversos artículos, con el resultado que los redactores de ese diario Juan José Lubary y Juan Ramón Vidal, sobrinos de Derqui, le dieron al pobre Editor una fuerte reprimenda "...con la amenaza de quitarle el puesto si admitía otro artículo mío".<sup>10797</sup> Y el Vista de Aduana de Caseros, Juan J. Delsar, le informaba al Jordanista Evaristo Moreno que el Dr. Derqui le escribió diciéndole "...que tratara de conservar una pequeña imprenta que existe en ese punto para en oportunidad establecer un periodiquín".<sup>10798</sup>

De esa forma, la prensa periódica jugaba un rol determinante en la caída electoral de las llamadas situaciones provinciales y de los integrantes de los gabinetes nacionales y provinciales. Desde Jujuy, el Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante le informaba a Roca que para un periódico de Córdoba, denominado "*El Interior*",<sup>10799</sup> que publicaba cartas y telegramas de Domingo T. Pérez y Benjamín Posse, "...yo soy un monstruo más feroz que [Vicente Solano] López del Paraguay".<sup>10800</sup> Desde Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el periódico "*El Mendocino*",<sup>10801</sup>

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos va a comer a todos sin peligro de que alguno se indigeste".<sup>10802</sup>

Y desde Córdoba, con motivo del nombramiento de Domingo F. Sarmiento como Ministro del Interior de la presidencia de Avellaneda, en el periódico "*El Pueblo Libre*",<sup>10803</sup> cuyo dueño y principal director era el Secretario de la Administración del Ferrocarril Sr. Julio S. Orórtgui, antiguo editor de "*El Jaspe*",<sup>10804</sup> se "...han desatado en groseros insultos contra él".<sup>10805</sup> Metidos en las porterías del Juzgado Federal y en las oficinas del Correo Telegráfico

"...difaman diariamente a la sociedad y al Gobierno, predicán a mansalva la revolución, proclaman a Tejedor, como al salvador de los pueblos y festejan los atentados del 26, como el principio de la restauración Mitrista".<sup>10806</sup>

Pero también la prensa periódica contribuyó directa o indirectamente, con su rol movilizador de la conciencia política colectiva, a gestar climas políticos propicios al golpe de estado. Según Bischoff (1994), en la redacción de "*El Pueblo Libre*" se gestó la frustrada revolución del 16 de febrero de 1880 contra el Gobernador Antonio del Viso.<sup>10807</sup> Esta revolución, a juicio de Hardoy (1993), estuvo fomentada desde Buenos Aires por el Gobernador Carlos Tejedor.<sup>10808</sup> Un par de años más tarde este periódico, redactado por Miguel Ángel Angulo y García,<sup>10809</sup> volvió a salir atacando al gobierno provincial de Juárez Celman por el hecho de tener

"...retreta todas las noches en la plaza, contribuyendo a que el pueblo se corrompa despreocupándolo de sus obligaciones con la música, cuando mucho mejor sería que esas horas de la noche fueran empleadas en rezar el rosario".<sup>10810</sup>

En La Rioja, Guillermo San Román y otros rochistas habían fundado el periódico "*La Defensa*"

"...que está destinado a dar el último golpe al Roquismo, débil y agonizante de antemano, porque sólo tiene vida pura y exclusivamente en algunos elementos oficiales de la Provincia y en el Cuartel de Enganche de esta ciudad".<sup>10811</sup>

Era "**La Defensa**", a juicio de San Román,

"...un arma formidable, porque ejerce influencia directa e inmediata sobre la masa de población de la Provincia, especialmente sobre el paisano de la campaña que no lee otro papel impreso".<sup>10812</sup>

Y seis años más tarde, en 1891, en opinión del Gobernador Joaquín V. González, el grupo presidido por el ex-Gobernador Guillermo San Román, un ex-rochista que había devenido en Juarista, pariente del entonces Senador Nacional Francisco Vicente Bustos, era

"...radicalmente mi enemigo, y mientras conferencian, tratan de minar el edificio en que me asiento, haciendo telegramas a **La Nación** en que me injurian y me calumnian, y su periódico en esta infunde desconfianzas sobre mi actitud hacia ellos".<sup>10813</sup>

Finalmente, la aparición del periodismo en la panoplia de la república moderna hizo necesario medir su rol en la transparencia de las luchas parlamentarias, judiciales y universitarias.<sup>10814</sup> Los periódicos oficiales, impresos con dineros públicos, y aquellos otros periódicos, subvencionados por los gobiernos de turno, se encarnizaban con los opositores.<sup>10815</sup> En Entre Ríos, en 1866, un artículo publicado en "**El Uruguay**" criticó acerbamente a la Legislatura, la que ofendida interpelló al Ministro, dada la relación que existía entre el periódico de marras y el Poder Ejecutivo. Este último no autorizó la concurrencia del Ministro negando los hechos imputados.<sup>10816</sup> No obstante que el Gobernador de Salta Juan Solá, de quien se sospechaba un Rochismo encubierto, negara tener participación alguna en los ataques que el periódico "**La Reforma**" hacía a los Gobernadores de Córdoba Juárez Celman y de Catamarca Mayor José S. Daza, el periodista Mariano Gorostiaga,<sup>10817</sup> le informaba a Juárez Celman que "**La Reforma**"

"...recibe subvención que el Gobernador no quiere quitársela a pesar de habérselo propuesto, lo que me hace creer que su declaración anterior, no tiene valor alguno".<sup>10818</sup>

En Santiago del Estero, en 1882, el Diputado Nacional Luis G. Pinto se puso al frente de su partido "...para protestar contra las injurias que el diario oficial de Santiago disipaba contra Roca y Juárez, y haciendo fuego a la candidatura de su propio hermano Juan por el solo peligro remoto de que siguiera las inspiraciones de Gallo y no las suyas".<sup>10819</sup> Y en 1885, el periódico oficial "**El País**", órgano del Gobernador Sofanor de la Silva, de quien también se sospechaba Rochismo, no lo defendía al Gobernador de Córdoba Juárez Celman de los ataques de los enemigos Rochistas y daba "...cabida a correspondencia injuriosa hacia Vd.", proveniente de "La Reforma" de Salta.<sup>10820</sup> Y en Entre Ríos, la prensa Mitrista, que a juicio del Jordanista Evaristo Moreno, blasonaba de independiente, y que en la Revolución del 80 secundaba al Movimiento Tejedorista, es la misma que --al igual que José Hernández desde "**El Río de la Plata**" defendió las atrocidades cometidas en la Puna contra poblaciones indígenas--<sup>10821</sup> quemando "...inciensó al Gral. Racedo,...se ha puesto completamente a su servicio abdicando de su independencia y liberalismo tan decantado".<sup>10822</sup>

### C-III La censura y la auto-censura.

Entre las actividades derivadas del periodismo, en nuestros países, la censura y la autocensura estuvieron siempre a la orden del día. Cuando el gobierno de una provincia periférica se hallaba tras el asedio periodístico de un diario metropolitano, las autoridades de la jurisdicción central corrían presurosas a ofrecer sus servicios para censurar al inoportuno. En el caso de Catamarca, en 1879, siendo el Rector del Colegio Nacional Dr. Fidel Castro, de filiación Católica, blanco de los ataques del diario *El Progreso*,<sup>10823</sup> de Córdoba, ampliamente conocido por su defensa del laicismo, el entonces ex-Diputado Nacional Roquista por Tucumán Miguel M. Nougues le comunicaba al Presidente Julio A. Roca que se había dirigido al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman sugiriéndole "...si cree conveniente haga que ese periódico se modere".<sup>10824</sup> En Salta, con motivo de un editorial de La Reforma, desfavorable para el Comité Juarista, el que luego fuera Gobernador de Salta, el Dr. Martín G. Güemes, (a) "El Caballero de los Trapos Sucios",<sup>10825</sup> lo visitó al periodista Mariano Gorostiaga, para suplicarle

"...en nombre de la amistad, que nada dijera en el *Diario [Popular]*,<sup>10826</sup> que se relacionara con el asunto del editorial, manifestándome con la sinceridad que lo caracteriza el fastidio que le había causado esta actitud tan imprudente".<sup>10827</sup>

En Tucumán, su futuro Intendente José Padilla,<sup>10828</sup> entendía como "...verdaderamente prudente y ocasionada", la indicación que hizo el Gobernador de Córdoba Juárez Celman a Silvano Bores

"...para que temple un poco la energía de nuestro diario [*El Deber*] contra los situacionistas y para que use menos galanterías con los Rochistas".<sup>10829</sup>

Pero Padilla creía "...haber descubierto en ello algo que me demuestra que Vd. no ha compulsado detenidamente la situación de Tucumán".<sup>10830</sup>

En La Rioja, en oportunidad del reportaje hecho al Diputado Nacional Dr. Leónidas Carreño, en el único periódico de oposición, denominado *El Independiente*, se hizo aparecer la administración del Gobernador Arcadio de la Colina como un verdadero desastre. Dudando que fuera un amigo el que así se expresaba públicamente, en un periódico de oposición a la situación nacional y provincial, De la Colina procuró en vano una rectificación.<sup>10831</sup> En San Juan, el Diputado Nacional Roquista Vicente C. Mallea se empeñó con el redactor de "El Zonda",<sup>10832</sup>

"...para que precindiendo de resentimientos propios, levantara el tono de su periódico a un lenguaje compuesto abandonando toda personalidad, lo que en el acto se consiguió".<sup>10833</sup>

Para el caso de que el periodista incriminado desempeñara asimismo las funciones de Juez, con el objeto de morigerarlo Vicente Mallea se valía de terceros. Este fue el caso del Juez Severo Igarzábal, redactor de *La Unión* (propiedad de Alejandro y Nicanor Garramuño),<sup>10834</sup> y hermano del Senador Nacional Rafael Igarzábal, quien "...bajó también el tono".<sup>10835</sup>

### C-IV La persecución y la extorsión. El empastelamiento de imprentas

Pero cuando los métodos pacíficos no alcanzaban a moderar la crítica opositora, el poder acudía por lo general a recursos más expeditivos. Entre ellos, la extorsión, los castigos, la prisión y aún la excomunión y la muerte de periodistas figuraban en el orden del día. Los periodistas que paralelamente detentaban un cargo público (ya sea en un Colegio Nacional, en el Banco, en la Justicia, o en el Correo), eran los más expuestos a la extorsión practicada por el poder. El ex-Gobernador Delegado de Tucumán y ex-Senador Nacional José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco",<sup>10836</sup> amigo íntimo de Sarmiento, cada vez que pretendió lanzarse a la prensa

"...el Ministerio del Ramo o el Presidente, como lo hizo Avellaneda [cuando publicaba artículos en el *Boletín del Independiente*], lo sofrenaron significándole que no consentirían que un empleado de la Nación viniese a combatir a Gobiernos que no hacían otra cosa que secundar la marcha del Presidente".<sup>10837</sup>

En La Rioja, Don Pedro P. Calderón,<sup>10838</sup> Rector del Colegio Nacional, fundador y director del periódico *La Rioja Moderna*, e íntimo amigo del finado Ministro de Gobierno Olímpides E. Pereyra, fue víctima en 1887 de su pasión periodística. Según el Secretario de la Legislatura Antonio Mir Márquez, el procedimiento observado con Calderón, al parecer tolerado por el Gobernador Bustos,

"...no tiene justificación posible ante la opinión de los demás amigos. Se le ha quitado el periódico, borrando su nombre de sus columnas como fundador, para entregárselo a un Sr. Avellaneda".<sup>10839</sup>

Y en San Juan, a fines de 1883 el Juez Severo Igarzábal fue destituido del cargo de Juez, aunque siguió conservando sus dos sueldos en el Colegio Nacional,<sup>10840</sup> por insultar en un escrito, donde tenía entablado juicio contra "*El Zonda*", "...a la situación, al Juez [Sánchez] Benavidez y al redactor de *El Zonda* [periódico en manos de la situación Roquista], con quien tiene añejo pleito de injurias".<sup>10841</sup> Mallea lo prevenía a Roca, que

"...ni [Anacleto] Gil, ni ninguno de los hombres de importancia de la situación le contestan ni hacen caso a Igarzábal, cuya conducta en el Juzgado, en la prensa y en todas partes no diré ya es indigna, sino escandalosa. No queda casi persona aquí a quien no haya tratado de difamar y con quien no haya tenido desagradados".<sup>10842</sup>

Cuando el autor de la nota o artículo era identificable, por llevar firma, otros métodos eran implementados. Mientras en tiempos de la anarquía, los periodistas como José María Salinas,<sup>10843</sup> y Florencio Varela eran cruelmente asesinados,<sup>10844</sup> en tiempos de la Organización Nacional, salvo excepciones como el caso del periodista sanjuanino José F. Echevarría,<sup>10845</sup> las modalidades criminales amenguaron su barbarie. En Córdoba, en 1867, el editor de *El Mosquito* Alberto Ortiz, fue atacado a latigazos por el Teniente Coronel Agenor Pacheco.<sup>10846</sup> Y veinte años más tarde, en febrero de 1888, la casa e imprenta del periodista Armengol Tecera, director de "*La Carcajada*",<sup>10847</sup> fue atacada por los operarios de "*La Conciencia Pública*".<sup>10848</sup> Para efectuar el ataque a la imprenta, los criminales

"...sacaron de la cárcel a un bandido que estaba allí condenado a diez años de presidio y se hicieron acompañar o escoltar por vigilantes que machete en mano empujaban hacia adentro con palabras propias sólo de gente de taberna".<sup>10849</sup>

En Entre Ríos, en 1871, el redactor de los periódicos "*El Rayo*",<sup>10850</sup> y "*El Independiente*", de filiación Jordanista, fue duramente apaleado.<sup>10851</sup> En Corrientes, el caudillo Mitrista Plácido Martínez, por redactar el periódico "*La Patria*", en franca oposición al gobierno de Manuel Derqui, le significó persecuciones, engrillamientos y prisiones.<sup>10852</sup> En Tucumán, en 1890, el renombrado periodista León Rosendal fue herido de tres golpes infligidos por el hermano del Juez Marcelino Torino, a quien Rosendal atacaba desde el diario "*El Orden*".<sup>10853</sup> Y en San Juan, con motivo de las ofensas inferidas en 1906 a los Diputados oficialistas, por la crónica parlamentaria de los diarios "*La Provincia*" y "*El Orden*", el periodista Juan R. Fernández fue procesado y condenado.<sup>10854</sup> En dicha oportunidad, Fernández alcanzó a defenderse negando a la Cámara Legislativa el derecho de ser juez y parte interesada en la causa, por ser ello atribución exclusiva de los Jurados de Imprenta.<sup>10855</sup> En otras ocasiones, los propios parientes del político afectado por la prensa opositora practicaban represalias violentas. En Santa Fé, el Administrador del periódico "*La Libertad*",<sup>10856</sup> Sr. Mousset, fué asaltado en la plaza por un grupo de siete matones encabezados por los hijos del que fuera Gobernador: Néstor y Urbano de Iriondo.<sup>10857</sup>

También en Córdoba, Salta y Mendoza se corrían riesgos semejantes. En Córdoba, el Diputado Nacional Francisco J. Figueroa le participaba al Gobernador Juárez Celman que había encargado a algunos

"...que vean los números de ese papelucho (*El Pueblo Libre*) por si se escriben torpezas en él o guaranguerías hacerle pegar a [Miguel Ángel] Angulo, una paliza, de lo que tendría mucho gusto".<sup>10858</sup>

Desde Salta, Eliseo Ortiz le advierte a Victorino de la Plaza que "...los Uriburu con el loco de Delfín Leguizamón escriben en "*La Opinión*" en tono muy subido contra nosotros".<sup>10859</sup> Casi veinte años después, la propia Legislatura perseguía a la prensa opositora. Isidoro López Plaza, redactor primero del periódico "*El Libre*",<sup>10860</sup> y luego del diario "*Actualidad*",<sup>10861</sup> con sus escritos en verso y prosa satirizaba con mordacidad a los Uriburistas, en especial a José de Uriburu y Poveda, (a) "Pobedón".<sup>10862</sup> La publicación de un artículo suyo en agosto de 1896 en "*El Cívico*" (Salta),<sup>10863</sup> un diario que antagonizaba a la oficialista "*La Razón*" [Salta],<sup>10864</sup> en el cual se empleaba el epíteto de "alcahuetes", con relación a trece diputados provinciales,<sup>10865</sup> provocó el enojo de la Legislatura, la cual ordenó el arresto de los autores del agravio. El Jefe de Policía cumplió la orden transmitida. Tras once días de arresto los autores del agravio obtuvieron un habeas corpus del Juez de Comercio, que el Jefe de Policía hizo efectivo. Irritada la camarilla de los trece diputados por la libertad de los arrestados, e instigada por el ex-Diputado Nacional Ángel M. Ovejero y los editoriales de "*La Razón*" (Salta),

"...le pareció llegada la oportunidad de desarrollar todo su plan de campaña contra el Sr. [Interventor Delfín B.] Díaz, contra su Ministerio, y sancionó el famoso decreto 'que suspendía la consideración de todos los asuntos que pendían de su sanción'".<sup>10866</sup>

Y desde Mendoza, el Gobernador Rufino Ortega le informaba a Roca que el Dr. Lemos, Periodista y Profesor de Historia Natural, "...era enemigo declarado del Gobierno de la Nación y del de esta Provincia", no así los jóvenes Tiburcio Benegas y Leopoldo Díaz, quienes tenían el peso de la administración, dirección y redacción de "*La Palabra*".<sup>10867</sup> Las ideas del Dr. Lemos, contrarias al gobierno

"...las ha hecho conocer bien claramente en "**El Ferrocarril**",<sup>10868</sup> diario que en sus columnas hace fuego a todo lo que hoy existe y que puede considerarse órgano de oposición".<sup>10869</sup>

Para el Gobernador Rufino Ortega, el lenguaje utilizado por "**El Ferrocarril**",<sup>10870</sup> y "**Los Andes**",<sup>10871</sup> era

"...soez, grosero, e indigno de una prensa culta,..., convencería al más obstinado de la pasión, del despecho y de la rabia que a sus redactores domina, así es que toda contemplación que se les tenga es machacar a hierro frío".<sup>10872</sup>

No debería extrañar, sigue Ortega,

"...que llegue un momento en que se tengan que emplear medios que conjuren una situación que procuro mantenerla a fuerza de calma y de paciencia. Pero todo tiene sus límites, máxime cuando se comprende el fin desmoralizador y subversivo de la prensa local".<sup>10873</sup>

Aún más, cuando el autor o autores de las notas críticas u ofensivas no era identificable, las imprentas donde se tiraban los periódicos imputados solían ser empasteladas.<sup>10874</sup> En Córdoba, en 1868, la imprenta de **El Progreso**, dirigido por el laicista Ramón Gil Navarro, fue empastelada por los católicos.<sup>10875</sup> Doce años después, el 1 de Noviembre de 1879, cuando la asonada del ex-Diputado Nacional por Catamarca Lisandro Olmos contra el Gobernador laicista Antonio del Viso fracasó, los partidarios de este último se ensañaron contra la imprenta del periódico **El Eco de Córdoba**, diario católico, empastelándola.<sup>10876</sup> Y otros cinco años después, en 1885, Rufino Varela y sus compañeros, obligaron a los operarios de "**La Carcajada**" a empastelar su propia imprenta, la dirigida por Armengol Tecera.<sup>10877</sup> En Concepción del Uruguay, la imprenta donde se tiraba **El Eco de Entre Ríos**, un periódico Jordanista, fue empastelada en 1871, en un par de oportunidades, por orden del Gobierno provincial.<sup>10878</sup> Desde Santiago del Estero, en Febrero de 1886, Niceo Acuña, Lisandro Olmos y Félix Avellaneda protestaban ante el Gran Comité Argentino (núcleo central del Rochismo) que

"...los periódicos de la oposición "**El Creyente**", órgano de los Gorostiaguistas [o Taboadistas], y **El Deber**, de los Irigoyenistas [Bernardistas], no podían publicarse mas con motivo del asalto a **El Autonomista**, prendiendo a sus redactores, regentes y operarios, el Dr. Ahumada, Dr. L. S. Herrera y Sr. Garay".<sup>10879</sup>

En Corrientes, en 1883, la imprenta de "**El Independiente**" y "**La Opinión**", fue arrojada al río Paraná por una pueblada a la que no fue ajeno el Inspector General de Armas Coronel José Toledo.<sup>10880</sup> En Tucumán, en 1878, fue empastelada la imprenta de "**El Independiente**", y en 1891, lo fue la del diario "**El Orden**".<sup>10881</sup> En 1887, el día que se enjuiciaba en la Legislatura de Tucumán la gestión gubernativa de Juan Posse, el Presidente Juárez Celman le informaba a Roca que

"...se han encarcelado 6 u 8 ciudadanos respetables [entre ellos Silvano Bores], manteniéndolos incomunicados en una letrina de la policía...por el delito de haber trascrito un suelto de otro diario".<sup>10882</sup>

Según Juárez Celman,

"...Don Juan [Posse], a diferencia de la Reina Victoria, lejos de alarmarse por las presiones, palizas, y conatos de asesinatos a periodistas, las encontraba lo más natural del mundo y hasta autorizados por un Reglamento de Policía que a pesar de lo que dispone la Constitución Nacional le daba a un Jefe funciones judiciales".<sup>10883</sup>

Indudablemente, especulaba Juárez Celman, "...si en Tucumán hubieran sido tratados los periodistas, como los sirvientes lo son en Inglaterra, la revolución [de 1887] no hubiera tenido lugar".<sup>10884</sup> En Jujuy, los Rochistas publicaban *El Norte* en la imprenta del Comité Irigoyenista, pero ésta era

"...tan deficiente que tenemos que pedir tipos prestados de otra imprenta de propiedad particular que está amenazada por el Ministro Tello de ser empastelada si publica algo que pueda contrariar a sus trabajos por [la candidatura de] Juárez Celman".<sup>10885</sup>

En Salta, un artículo que contrariaba propagandas y hechos de la familia Uriburu fue arrancado de las formas del periódico "*La Situación*",<sup>10886</sup> momentos antes de publicarse, por orden de Don José Uriburu, aduciendo "...por única razón el pertenecer la imprenta a la familia".<sup>10887</sup> Durante la gestión del Gobernador Güemes, la imprenta de "*El Diario Popular*",<sup>10888</sup> que en el '80 sirviera para sostener la candidatura de Roca, y en 1886 la de Juárez Celman para la presidencia y la de Martín G. Güemes para la gobernación,<sup>10889</sup> fue mandada empastelar por el propio Gobernador aduciendo haberse vuelto opositora.<sup>10890</sup> Y en 1903, en la misma Salta, *La Democracia* fue empastelada por los socios del Club 20 de Febrero con motivo de una nota publicada haciendo referencia a dicho club.<sup>10891</sup>

En otras ocasiones, el poder buscaba deshacerse de la oposición periodística mediante métodos más sofisticados. En Corrientes, durante el gobierno de Manuel Derqui, el periódico "*La Verdad*",<sup>10892</sup> propiedad de un Diputado Provincial independiente, fue embargado ocho años después de fundado, en 1884, por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, a requisición de un supuesto acreedor de dicha imprenta.<sup>10893</sup> En Córdoba, el Pbro. Uladislao Castellanos, en su Pastoral de 1880 se quejaba de los desbordes del periódico "*La Carcajada*", dirigido por Armengol Tecera; y el Vicario Dr. Jerónimo Clara en otra Pastoral fechada cuatro años después, el 25-IV-1884, advertía al pueblo que la Iglesia prohibía leer el referido semanario.<sup>10894</sup> Y en Tucumán, agobiado por las deudas y la derrota que significó la Revolución del 90, el periódico "*El Deber*",<sup>10895</sup> de filiación Juarista, vio en 1891 como luego que sus suscriptores se desafilaban su imprenta era vendida en remate público.<sup>10896</sup>

## C-V Las calumnias y los duelos.

Cuando el lenguaje periodístico alcanzaba un nivel virulento y a través de la prensa se calumniaba, eran comunes los llamados juicios de imprenta y los duelos para reparar la honra vapuleada.<sup>10897</sup> En San Luis, Departamento de Junín, el afamado periodista Joaquín Carlés, director de "*El Oasis*",<sup>10898</sup> fue acusado por el Director de La Capital de Rosario, Dr. Ovidio Lagos, de calumniar sin medida.<sup>10899</sup> Tres años más tarde, era a Carlés al que le tocaba referir que el ex-caudillo político Saasista devenido en Rochista, Rosario Suárez,<sup>10900</sup>

"...miente como un condenado y es colosalmente audaz, aunque no valiente, como lo demostró en un desafío conmigo [Joaquín Carlés], provocado por él, a causa de artículos de *El Oasis*, en el que elegí la pistola, y tuvo la prudencia de retirarse, como es público y notorio".<sup>10901</sup>

En Mendoza, cuando en 1890 el periódico "*El Debate*",<sup>10902</sup> injurió a través de un artículo firmado con seudónimo, al entonces Diputado Nacional Benito Villanueva, este "...inmediatamente dio los pasos para conocer al autor y retarlo a duelo si se trataba de una persona digna".<sup>10903</sup> Luego de negarse con subterfugios a dar el nombre del autor del libelo, su propietario Juan de Rosas dio a los padrinos del Diputado "...una lista de 20 personas para que declaren que todos son honorables y dignos de medirse con Benito".<sup>10904</sup>

Por ese y otros motivos, los verdaderos dueños de los periódicos políticos preferían eludir su responsabilidad editorial alquilando editores amigos. En Santiago del Estero, el Gobernador Luis G. Pinto nos informa en 1882, que un incidente fue producido por un suelto periodístico en respuesta a otro de *Las Provincias*,<sup>10905</sup> "...de un lenguaje muy duro e hiriente contra mí".<sup>10906</sup> Según el que luego fuera el Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, el suelto parecía ser de Absalón Rojas,<sup>10907</sup> pero a juzgar por una investigación de campo hecha por unos amigos, "...su autor era un tal [Benjamín] Avalos, y de ninguna manera Rojas".<sup>10908</sup> Un tal Susini había contestado el ataque con otro artículo extensísimo.<sup>10909</sup>

Pero los intereses creados de las estructuras sociales y económicas dominantes no lograron controlar la función desestabilizadora de la prensa política.<sup>10910</sup> El clima revolucionario desatado en la Argentina por la Revolución del 90 se vio reflejado en la prensa periódica de todo el país. En San Luis, el principal periódico era el órgano de la Unión Cívica. Su director, Germán Ave-Llallent,<sup>10911</sup> quien fuera luego fundador del Partido Socialista en la Argentina, publicaba en 1890 un artículo que precipitó las iras del Roquismo local.<sup>10912</sup> El ex-Gobernador y entonces Senador Nacional Toribio Mendoza, le aseguraba a Roca,

"...que cuanto en él se dice es una infamia y una torpe calumnia. Hoy mismo me he presentado al Juez del Crimen, demandando a su autor Germán Ave-Llallent, casado en la familia de Juan Sáa, de triste memoria, y pariente del [Coronel] Rosario Suárez; por calumnias e injurias y el Gobierno ha hecho acusar por intermedio del Fiscal dicha publicación".<sup>10913</sup>

La conciliación con la Unión Cívica, a posteriori del Acuerdo Roca-Mitre, fue iniciada en Córdoba por el Jefe de Policía Julio Astrada, valiéndose del periodista gallego José Rodríguez del Busto, un Paloma Blanca de la Unión Cívica,<sup>10914</sup> redactor y dueño de los periódicos "*La Picota*" y "*El Debate*", que a juicio del Ministro de Gobierno Felipe Díaz era "...el peor elemento que puede buscar con ese fin, pues es bien conocido el pésimo concepto que debe a este pueblo".<sup>10915</sup> La facción partidaria denominada los Palomas Blancas, era operada por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo",<sup>10916</sup> y contaba en 1892 con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, Ángel Machado,<sup>10917</sup> y Alejandro Vieyra,<sup>10918</sup> que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,

"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel y amagan revolución".<sup>10919</sup>

Pero en la Unión Cívica, que "...no es numerosa, ni tiene composición compacta", y donde dominan los clericales, "...al punto tal que ayer el artículo de *El Porvenir* (Córdoba) decía que ellos trabajaban en política siguiendo las inspiraciones de León XIII",<sup>10920</sup> prevalece la opinión de restar colaboración al régimen del Acuerdo, colaboración que consistía en aceptar los incentivos selectivos ofrecidos por el régimen gobernante, es decir integrar con ellos listas comunes.<sup>10921</sup> En Diciembre de 1892, los entretelones de una elección municipal, donde el radicalismo fue derrotado mediante el fraude, provocaron, merced a los ataques de los diarios "*La Libertad*",<sup>10922</sup> "*Sol de Mayo*",<sup>10923</sup> y "*El Porvenir*",<sup>10924</sup> la caída del Ministro de Gobierno Dr. Nicolás Manuel Berrotarán Garzón, y éste arrastró en su caída al Gobernador Manuel Dídimo Pizarro.<sup>10925</sup>

La publicación de periódicos políticos era extremadamente costosa. La propiedad o posesión de la imprenta era el elemento clave. En Tucumán, el diario "*La Razón*",<sup>10926</sup> era impreso en una imprenta que pertenecía por arriendo en 1880 a Absalón Rojas y Lídoro Quinteros.<sup>10927</sup> Dicha imprenta le fue entregada a Silvano Bores para que redactara "*La Razón*" (Tucumán) con el objetivo que sirviera de órgano de la candidatura presidencial de Roca, pero usufructuando de ese privilegio "...ha emprendido ya su campaña atacando a todos los que aceptan la candidatura [a Diputado Nacional] de [Marco] Avellaneda".<sup>10928</sup> Lo peor de todo, según Rojas, es que aprovechándose de la imprenta, el redactor Bores

"...resulta aspirando también la diputación y se ha lanzado a la lucha contando mas que con el prestigio de su nombre, con la impopularidad de [Marco] Avellaneda".<sup>10929</sup>

Sólo ha querido desistir de su empeño a condición de que "...se elimine la [candidatura] de Avellaneda por cualquier otra que de antemano se comprometían aceptar tanto él como los que lo apoyan".<sup>10930</sup> Y en San Luis, por las acciones de la imprenta del ferrocarril en manos de Ignacio Aldao, este último le pedía a Lídoro Quiroga, Presidente del Comité Rochista "...lo que no vale toda la imprenta".<sup>10931</sup>

## **C-VI Las fuentes de financiación, información y mano de obra especializada (operarios).**

La financiación del periodismo político por los partidos políticos daba lugar a toda clase de celos, y manejos deshonestos, por cuanto tanto los miembros de la elite política como los del periodismo, salvo escasísimas excepciones, evolucionaban permanentemente de una facción a otra. En oportunidad de la campaña electoral para suceder a Roca, a fines de 1885, las facciones políticas se disputaban los diarios de mayor prestigio. En Santa Fé, los únicos diarios fundados por el partido Autonomista, lo fueron a juzgar por la opinión de Estanislao Zeballos, "...de mi bolsillo (dos de ellos en el Rosario)".<sup>10932</sup> Y en Tucumán, *La Razón* era el periódico de mayor relevancia literaria, en gran parte merced a los artículos y notas de Arnaled de Segovia.<sup>10933</sup> El crédito con el Banco Nacional no le obstó para negociar con el Comité Rochista la independencia de su línea política. Entre Salvador Alfonso,<sup>10934</sup> en representación del diario, y Carlos M. Maldonado y Tiburcio Padilla,<sup>10935</sup> en representación del Comité Rochista, llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambos.<sup>10936</sup> La propuesta de Juan B. Lacroix, miembro de otra facción Rochista, fue desestimada.<sup>10937</sup> *La Razón* cedió su dirección política al Comité Rochista, más precisamente primero a Pepe Posse y luego a Carlos M. Maldonado,

"...por la suma de \$15.000 m/n comprometiéndose a hacer todas las publicaciones e impresiones que el Comité le encargue mientras dure la lucha electoral".<sup>10938</sup>

Seis meses después de celebrado el contrato, el desairado Juan B. Lacroix le confiaba a Rocha en 1886 que **La Razón** está "...robando al Gran Comité los dineros que en ella se gastan pues todas sus tendencias son más bien al Juarismo".<sup>10939</sup> Ello no podía ser de otra manera por cuanto "...su administrador es Juarista, su director, su noticiero y otros empleados mas de mayor y menor importancia que indico".<sup>10940</sup>

Cuando los periódicos políticos contaban con sólido prestigio y no podían continuar ejerciendo su tarea con independencia solían ser vendidos a la oposición.<sup>10941</sup> En Salta, el **Diario Popular**, a juicio del Diputado Provincial Darío Arias Royo, "...será comprado por los opositores [Irigoyenistas]".<sup>10942</sup> Este diario, a juzgar por la versión de Mariano Gorostiaga, se "...lo hace circular profusamente por la campaña y se lo remite a los Comités Juaristas de las Provincias".<sup>10943</sup> En Tucumán, en 1884, durante la gobernación de Santiago Gallo, la imprenta y el establecimiento tipográfico de **El Republicano**,<sup>10944</sup> cuyos directores eran Ramón E. Cañaveras y Félix C. Sánchez, tras la disolución de la sociedad, fueron adquiridos por **La Razón** (Tucumán), siendo su nuevo administrador Salvador Alfonso y la pluma más relevante la de José García Arnaled de Segovia.<sup>10945</sup> Y en Santa Fé, Antenor Pita trataba en 1884 de subvencionar a "**El Independiente**",<sup>10946</sup> y a "**El Mensajero**",<sup>10947</sup> que

"...están dispuestos a servirnos, así al menos nos lo demuestran, y considerando que en este asunto campea por mucho el interés pecuniario les daremos por el gusto".<sup>10948</sup>

## C-VII Las prácticas corruptas en el periodismo.

Cuando la alternativa de compra de un periódico no era factible se acudía lisa y llanamente a prácticas corruptas. En estos casos no era necesario fundar o adquirir periódicos por cuanto algunos redactores o miembros de los grandes diarios vendían sus servicios aceptando ser cohechados con dádivas o presentes, hoy conocidas bajo el nombre de chivos, y en otros casos simplemente se les ofrecía a los redactores contratos mejores. Absalón Rojas le informaba a Roca que era bien sabido que el Director General de Correos y Telégrafos, Dr. Carlos Carlés, "...distribuye alrededor de \$40.000 anualmente a gente de los diarios **La Nación, La Prensa, Tribuna, El Diario, y El Tiempo**".<sup>10949</sup> Rojas agregaba en su misiva que podía incluso "...precisar los nombres propios y cantidades [de pesos]".<sup>10950</sup> En Mendoza, donde el diario **La Palabra**,<sup>10951</sup> era el órgano oficial Juarista,<sup>10952</sup> al Gobernador Rufino Ortega le constaba que en enero de 1885 los redactores de los periódicos "**El Ferrocarril**", y "**Los Andes**",

"...están comprados por el círculo Rochista, habiendo recibido la consigna de atacar, por ahora a los Ministros, dejando para más tarde el atacarme a mí, pues se cuenta o se cree que yo pudiera responder a las miras y trabajos de Rocha".<sup>10953</sup>

Desde Corrientes, Manuel Derqui y Angel Soto le informaban a Roca que los editores responsables de los periódicos opositores no son los verdaderos dueños de los mismos. Los individuos que estuvieron con Rocha fundaron en Corrientes un periodiquín, titulado "**Alto Paraná**",<sup>10954</sup> con una imprenta perteneciente al ex-Gobernador Antonio Gallino, cuyos principales redactores eran Mitristas, y que

"...para sorprender y sacar la brasa por mano ajena, tienen de editores responsables a tipos insignificantes que se dicen amigos, y que no son sino pilluelos sin importancia",<sup>10955</sup>

que "...tiran la piedra y esconden la mano, porque encuentran tontos para editores responsables".<sup>10956</sup> En Catamarca, el Gobernador José S. Daza se propuso neutralizar al órgano clerical "*El Creyente*",<sup>10957</sup> ofreciéndole "algo" a su redactor, a quien no identifica por su nombre y apellido pero que es "...camarada mío, mozo joven y de aspiraciones, posee una buena inteligencia clara y somos medio parientes".<sup>10958</sup>

La disputa o competencia por las primicias políticas, los chismes, los redactores, los operarios y el dinero eran moneda usual entre los medios de prensa. En Córdoba, en la década del 50, entre los periódicos *El Diario* y *El Imparcial* se disputaban los operarios salvajemente.<sup>10959</sup> Aún en una misma facción política existían rivalidades imposibles de superar. Entre los Juaristas en Buenos Aires, la aparición del periódico "*La Argentina*" le trajo grandes pérdidas al diario "*Sud-América*".<sup>10960</sup> También se dió esta competencia entre los Irigoyenistas (Bernardistas). En Salta, el periódico "*La Reforma*",<sup>10961</sup> constituido en órgano del partido Irigoyenista, "...aunque no haya proclamado su candidatura por habérselo prohibido el Gobernador",<sup>10962</sup> había pecado con su editorial de deslealtad, por cuanto "*El Diario Popular*" había accedido a no hacer trabajos ostensibles por la candidatura de Bernardo de Irigoyen "...mientras no recibamos indicación en este sentido del Comité Central".<sup>10963</sup> Y cuando las competencias y desavenencias entre periódicos políticos afines alcanzaban niveles salvajes, era común que se negociaran armisticios. El ex-Gobernador de Córdoba y Ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Córdoba Dr. Enrique Rodríguez,<sup>10964</sup> lo visitó a Ovidio Lagos en 1885 para hacerle presente la necesidad de concluir con las discusiones entre los diarios "*El Mensajero*" y "*El Independiente*" (dirigido por el líder del Club 25 de Mayo Deolindo Muñoz) por un lado, y "*La Capital*" (dirigido por O. Lagos) y "*La Convención*" por el otro.<sup>10965</sup> "*El Independiente*" tenía entablada una acusación criminal contra "*La Capital*" por publicaciones reputadas injuriosas.<sup>10966</sup>

## C-VIII Las redes telegráficas y ferroviarias.

Por último, la red de relaciones de un periódico no se agotaba con su propia publicación. El tendido del telégrafo, en la segunda mitad del siglo XIX, influyó en la expansión del periodismo y en el tramado de una red de corresponsales a lo largo de toda una nación o de una región.<sup>10967</sup> A su vez, la concentración de poder económico y político en la capital porteña se extendió al ámbito periodístico. Los grandes diarios de Buenos Aires y Rosario inauguraron corresponsales en el interior del país y desde el exterior del mismo.<sup>10968</sup> En Córdoba, en oportunidad del Acuerdo Roca-Mitre lo que le llamaba la atención al Gobernador Eleázar Garzón era

"...el proceder de *La Nación*, enemiga de los radicales, pero su corresponsal es enemigo del acuerdo, y nos da todo el palo que puede, es claro que si doy entrada al radicalismo en dos días está cambiado todo y seré un santo para *La Nación*".<sup>10969</sup>

No bastaba entonces la orden que se dice dio el Gral. Mitre a sus corresponsales de *La Nación*, "...que se moderen, porqué siguen el mismo camino en otra forma tomando el tono de hipócrita".<sup>10970</sup> La opinión de Garzón era que Mitre

"...debe elegir y marchar decididamente con los que elija, levantándolos y rodeándolos del debido prestigio. Si elije a los Acuerdistas que se nos dé el nombramiento de un corresponsal acuerdista que si no nos defiende [al menos] no nos ataque".<sup>10971</sup>

Pero el diario "*La Nación*" "...desprestigia las situaciones y apoya los radicales en las provincias, o lo que es lo mismo nos ataca a nosotros y apolla [sic] a sus enemigos".<sup>10972</sup> En este caso, dice Garzón, "...con hacernos enemigos nos dejará de atacar, porqué tendremos al apollo [sic] de los corresponsales y seremos santos".<sup>10973</sup> Finalmente, Garzón concluye recomendándole a Roca privar a los radicales del telégrafo pues como el valor de la Unión Cívica

"...está en el telégrafo, no le publiquen los telegramas en *La Nación* y dos días después me dirán lo que vale".<sup>10974</sup>

En Salta, el ciudadano español Teodoro M. Lindozo,<sup>10975</sup> conjuntamente con su amigo Ricardo López eran corresponsales de "*La Tribuna*" (Buenos Aires), habiendo sido Lindozo también de "*La Prensa*" (Buenos Aires), y se creía también que lo fué de "*El Tiempo*" (Buenos Aires); y el futuro Senador Nacional Dr. Carlos Serrey, perteneciente al círculo Güemista, era corresponsal de "*La Nación*" (Buenos Aires).<sup>10976</sup> Desde Tucumán, el Gobernador Benjamín Aráoz le advierte a Roca que para impresionar los espíritus se "...ha formado una verdadera conspiración entre tres corresponsales de diarios de la capital".<sup>10977</sup> Ellos eran: de "*La Prensa*", León Rosenwald;<sup>10978</sup> de "*La Nación*", Gaspar Taboada,<sup>10979</sup> y las veces que éste último se ausentaba lo reemplazaba el hijo mayor del Dr. Próspero García, "...una alimaña que vive despechada y rabiosa"; y de "*El Diario*", Antonino Lascano.<sup>10980</sup> Entre estos tres corresponsales, Aráoz denuncia que

"...han formado el complot de trasmitir a diario una invención, una mentira, a veces graves calumnias contra el gobierno de esta provincia, convencidos que así, con la gota constante, se forma mala atmósfera al mejor gobierno, y con doble facilidad al modestísimo que hoy tiene Tucumán".<sup>10981</sup>

En Entre Ríos, los corresponsales de los diarios de la capital, que hacían creer en 1899 que en esta provincia "...gobiernan los sobrinos del Dr. [Leónidas] Echagüe", eran a juicio de Benito E. Pérez [Colman], los mismos periodistas que en Paraná redactaban los diarios de la oposición.<sup>10982</sup> Y en Mendoza, Francisco Civit sostenía en 1900 que

"...el corresponsal de *La Nación* es Eduardo Teisaire y agente activo de [Juan Eugenio] Serú; Don Federico Palacios, yerno de Don Carlos González, es Director de *El Debate* y corresponsal de *La Prensa*; y un ruso Don Alejandro Paulosky es corresponsal de *El Tiempo* y redactor de *El Debate*".<sup>10983</sup>

Y Barraquero (1926) confirmaba que a fines de siglo, la "...atmósfera desfavorable que realmente se ha propagado contra el gobierno de aquella provincia [Jacinto Alvarez]",<sup>10984</sup> obedecía a que el corresponsal de "*La Nación*" [Eduardo Teisaire] era secretario de la Unión Provincial, y Procurador del estudio del Diputado Juan Eugenio Serú; y el corresponsal de "*La Prensa*" era Don Federico Palacios,<sup>10985</sup> pariente cercano de Serú, y

también miembro de la Unión Provincial, y "...tienen carta blanca para dirigir telegramas".<sup>10986</sup>

Asimismo, la diagramación de las redes ferroviarias incidió en la velocidad e intensidad de la distribución de diarios y periódicos. Cuando el telégrafo se descomponía, las noticias de otras provincias se podían conocer sólo a través de los diarios de Córdoba y de Buenos Aires. Lo que pasaba en Catamarca en 1886, lo sabía en La Rioja el Gobernador Francisco V. Bustos, "...por los diarios de Córdoba".<sup>10987</sup>

Podemos concluir que la conculcación de la libertad de prensa y los niveles de corrupción en los ambientes periodísticos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de la modernidad colonial-absolutista aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX, al extremo de demorar y bastardear el proceso de modernización.

#### Capítulo V-A-4: **Censura en las comunicaciones telegráficas**

##### **Índice**

- D-I Tradición historiográfica en materia de censura telegráfica.
- D-II Violación y espionaje a la correspondencia postal y telegráfica.
- D-III Vinculaciones entre la telegrafía y el periodismo.

##### **Introducción al capítulo V-A-4:**

En materia comunicacional también cabe preguntarse si la administración postal y telegráfica contó siempre en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario pueden hallarse en su desempeño histórico fuertes altibajos, desajustes o involuciones. Para responder en parte a este interrogante, en este trabajo analizamos al servicio telegráfico en su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política; su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno; la violación y el espionaje a la correspondencia postal y telegráfica; y las paralelas vinculaciones con el periodismo y su instrumentación como testimonio de legalidad. Para este estudio, hemos aplicado el análisis indicial, de Ginzburg (1983), y el intersticial o residual,<sup>10988</sup> del que nos habla Carmagnani (1988), seleccionando una docena de textos de época hallados en las correspondencias presidenciales de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, así como en la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.

En la constitución y la caída de las situaciones provinciales el correo y el telégrafo fueron desde sus inicios instrumentos extremadamente envidiables de poder, favoritismo y discriminación política. Apenas a los cuatro años de inauguradas las líneas telegráficas por el Presidente Sarmiento, en 1874, cuando aconteció la revolución de "La Verde", los Mitristas tuvieron en la provincia de Buenos Aires diversas Oficinas Telegráficas "...para tomar la correspondencia del Gobierno Nacional".<sup>10989</sup> Tres años más tarde, en 1877, el Presidente de la Cámara de Apelaciones Dr. Amadeo Benítez le explicaba al General Roca

desde San Nicolás porqué razón no era explícito en el Correo, pues "...las cartas han sido abiertas casi siempre por Alsinistas interesados en saber lo que dicen u hacen sus enemigos o sus émulo".<sup>10990</sup> Desde San Juan, el ex-Diputado Nacional Dr. Hermógenes Ruiz le advertía al Presidente Roca que nombrar de Interventor de Correos a Nicanor Garramuño "...sería tener allí un espía siempre desleal para con aquellas personas que le dispensaran aquel favor".<sup>10991</sup> Y tres días más tarde, en un operativo epistolar aparentemente orquestado, un Oficial de la Guardia Nacional, Román Videla, le expresaba a Roca que el nombramiento de Garramuño "...ha alarmado a todos los amigos y mucho más cuando se ha postergado a D. Arnovio Sánchez".<sup>10992</sup> Y en febrero de 1883, Román Videla le transmite al entonces militante de la facción radicalizada de la coalición liberal opositora al gobierno sanjuanino de Anacleto Gil, el Inspector de Irrigación y Agricultura de la provincia y futuro conspirador en el atentado del cual resultó asesinado el ex-Gobernador de San Juan Agustín Gómez, Don Napoleón Burgoa, que "...una carta que le ha escrito a Vd. ha sido violada, y no puede ser de otra manera porque muchos saben su contenido".<sup>10993</sup> A propósito de este entuerto, el ex-Gobernador de San Juan Rosauro Doncel le expresaba a Roca que

"...parece que nos familiarizamos con la inmoralidad y que encontramos lo más natural del mundo abrir y leer una carta dirigida al primer magistrado de la Nación, y después hacemos alarde de repetir o referir el contenido sin ruborizarnos".<sup>10994</sup>

Desde San Luis, el Diputado Nacional Toribio Mendoza y el Gobernador Rafael Cortés le escribían a Roca en 1878 haciéndole presente la necesidad que había de cambiar el Administrador de Correos de San Luis, por no ofrecer

"...garantía alguna para la correspondencia por sus malas condiciones, aparte de otros defectos capitales que lo inhabilitan para ocupar este puesto y que no quiero mencionar por ser muy conocidos de la generalidad".<sup>10995</sup>

Aparentemente en el Correo y en los Telégrafos no existieron incompatibilidades ni se implementaron circulares semejantes a las que rigieron en el Ministerio de Instrucción Pública, en la Inspección General de Armas, y más luego en los Bancos oficiales, prohibiendo a sus empleados tomar parte en la política local.<sup>10996</sup> Por el contrario, las autoridades de los Distritos de Correos y Telégrafos así como las oficinas de la Defensa Agrícola Nacional enviaban tradicionalmente Partes Mensuales con detallados diagnósticos políticos, prolongándose estas prácticas hasta bien entrado el siglo XX.<sup>10997</sup> En La Rioja, en 1883, hasta el Jefe de la Oficina de Telégrafos era candidato para futuro Gobernador de esa provincia.<sup>10998</sup> Y en 1884, el Gobernador Jamín Ocampo le informaba a Roca que

"...con la mayor injusticia se ha suspendido al telegrafista Herrera,...dejando este medio de comunicación en manos únicamente del yerno del Senador [Nicolás] Barros [un tal Grandolí]".<sup>10999</sup>

La Dirección de las Oficinas de Telégrafos era un botín de guerra al servicio ostensible de los gobiernos de turno. Desde Tucumán, el periodista santiagueño Carlos M. Maldonado le informaba al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Dardo Rocha, que

"...los Juaristas quieren apoderarse de la dirección de la Oficina de Telégrafos en Tucumán, que es la llave [por ser central retransmisora] para Salta, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero".<sup>11000</sup>

Y cuando los Inspectores Colombres,<sup>11001</sup> afiliados al Rochismo, fueron suspendidos del servicio por el Juarismo, su pariente Benjamín Paz (Ministro de Gobierno del Gobernador Eugenio Méndez, partidario de Bernardo de Irigoyen), cuya esposa era Dalmira Colombres Gutiérrez, se enfureció y advirtió que "...no he de permitir que nadie suspenda a ninguno de los empleados de Tucumán".<sup>11002</sup> El Jefe Interino nombrado en Tucumán en reemplazo de los Colombres, un tal José D. Soliveres,<sup>11003</sup> era a juicio del Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López, "...peor que los Colombres, es hechura de [Luis] del Carril,<sup>11004</sup> y tráfuga como éste".<sup>11005</sup> Pero la clave de la intriga desatada la da una carta de Juan B. Lacroix,<sup>11006</sup> dirigida a Rocha, en la que el primero reconoce que

"...hasta hace dos días era dueño absoluto de la oficina de Telégrafos de esta, dominando por consiguiente cuanto plan desarrollaban nuestros enemigos en las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, y Jujuy y algo de Santiago del Estero".<sup>11007</sup>

El motivo de la pérdida de poder obedeció, a juicio de Lacroix, a una imprudencia de un tal Luis del Carril que

"...nos ha hecho perder este recurso tan importante costando la destitución de un empleado, pero entre dos o tres días estará nuevamente reemplazado y podré continuar en mi obra".<sup>11008</sup>

Lacroix le confesaba a Rocha, que "...tengo documentos tan notables que pueden llamarse piezas preciosas, para confundirlo a Roca especialmente".<sup>11009</sup> En cuanto a Soliveres, ahijado de del Carril, no duró mucho en el cargo, pues en Febrero de 1886 fue destituido debido a su filiación Rochista. Del Carril creía que Soliveres, una vez destituido, había pasado a Buenos Aires, donde se habría colocado "...al frente de alguna de las estaciones telegráficas de aquella Provincia", pero "...no le fue posible hacer el viaje por haber sido avisado de que al pasar por Córdoba había orden de prisión contra él, razón por la que ha regresado a ésta".<sup>11010</sup>

Desde Santiago del Estero, el entonces Diputado Nacional Absalón Rojas le informaba a Roca que el Inspector Pablo Lascano,<sup>11011</sup> escribe en el periódico La Prensa Libre, de Mariano Gorostiaga,<sup>11012</sup> y su empeño "...por retirar al telegrafista Gerné so pretexto de conveniencias del servicio, para colocar otro que ha propuesto, obedece a esos mismos propósitos de conspiración".<sup>11013</sup> Y en 1885 le escribe al Gobernador Juárez Celman, informándole que acababa de pedir al Presidente Roca y al ex-Subsecretario de Marina y entonces Director General de Correos y Telégrafos Olegario Ojeda,<sup>11014</sup> solicitándoles que le ordenen al Inspector de Telégrafos Pablo Lascano, quien se hallaba

"...completamente embanderado en la oposición,...que vaya a La Rioja donde tiene orden de permanecer dirigiendo la reparación de la línea y no sé porqué viene burlándose de esas ordenes hace mucho tiempo".<sup>11015</sup>

Desde Córdoba, el Director de Telégrafos Pedro López le informaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, que el Inspector Lucio Capdevila lo ha "...colocado en una posición un tanto embarazosa".<sup>11016</sup> El hecho era que en dos oportunidades Capdevila

había logrado frustrar sus propios traslados. En la primer oportunidad, debido a las quejas que el Gobernador hiciera acerca del mal servicio de la Oficina de Córdoba, y en que se "...adoptó la medida de trasladar a todo el personal", Capdevila obtuvo la contraorden que lo mantuvo en el puesto. Y en la segunda, Capdevila logró otra contraorden "...que habrá sido obtenido por pedidos de Ortega".<sup>11017</sup> López se dirigió a la Dirección General de Correos y Telégrafos informando que la moral del servicio "...se relajaría si queda éste en Córdoba". López tenía "...vehementísimas sospechas de que nos está traicionando y que hasta los mismos telegramas del Presidente son violados".<sup>11018</sup>

Para fines de siglo, en 1896, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le informaba a Roca que en la Dirección de Correos y Telégrafos "...se está montando una máquina política".<sup>11019</sup> Luego de colocar, en Rosario y Buenos Aires, que eran la llave de las comunicaciones, a dos de sus parientes, el Director General de Correos y Telégrafos Dr. Carlos Carlés,<sup>11020</sup>

"...acaba de decretar que solo se trasmitan directamente a su destino los despachos del Presidente, ex-Presidentes, Ministros y Jefe del Estado Mayor".<sup>11021</sup>

Por el contrario, los despachos de los demás usuarios debían "...transmitirse a Central".<sup>11022</sup>

#### **D-I Tradición historiográfica en materia de censura telegráfica.**

La historia aplicada a la esfera pública en el terreno de las comunicaciones (postales, telegráficas, radiotelefónicas y electrónicas) no ha sido un espacio asiduamente frecuentado por la historiografía política.<sup>11023</sup> Desde una perspectiva de economía política, Gillespie y Robins (1989) y Garnham (1990a) han sostenido que debido al crecimiento de la infraestructura informativa privatizada --que lleva a vencer la tiranía de la distancia geográfica y también lleva a una creciente disparidad entre los que poseen información y aquellos que no la poseen-- se justifican la provisión y los subsidios públicos a los servicios de información.<sup>11024</sup> Por otro lado, desde una perspectiva post-estructuralista, Gandy (1994) y Agre (1994), han sostenido que dicho crecimiento informativo llevaba a la extensión de cada vez más grandes sistemas de vigilancia y control.<sup>11025</sup> Y recientemente, para Luhmann (1995) y Friedland (1996), sin el desarrollo de las comunicaciones (periodismo, telegrafía, telefonía, radio-televisión, etc.) es imposible ensanchar la esfera pública y "...crear cadenas complejas de poder en las burocracias políticas y administrativas, mucho menos el control democrático sobre el poder político".<sup>11026</sup> Finalmente, para la teoría general de sistemas, representada últimamente por Morin (1992), las instituciones políticas --como las comunicaciones-- son meras instancias, cambiables y transitorias, de redes de relaciones más extensas y fundamentales.<sup>11027</sup>

En cuanto a la historiografía local, autores como Castro Estévez (1934-52) y Galván Moreno (1944a) incursionaron en la elemental reconstrucción de la historia institucional. Por otro lado, autores como Hodge (1984) y Bose (1987) intentaron comprobar las vinculaciones entre estas últimas y la formación de la nacionalidad. Solo los trabajos de Johnson (1948) y Mc Evoy (1994), aunque referidos a Chile y Perú respectivamente, han intentado analizar con éxito las múltiples relaciones y fracturas entre las comunicaciones y el poder político propiamente dicho. En ese sentido, lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima

conexión que se dio en ese entonces entre los mecanismos comunicacionales (telegrafía) por un lado y los regímenes electorales, judiciales y educativos por el otro.<sup>11028</sup> Es en esta línea de investigación que este trabajo tratará de inscribirse.<sup>11029</sup>

## **D-II La violación y el espionaje a la correspondencia postal y telegráfica.**

Las violaciones a la correspondencia telegráfica estaban a la orden del día. Desde Santiago del Estero, en 1878, el futuro Ministro de Gobierno del Gobernador Pedro Gallo, Don Telasco Castellanos, prevenía a Roca que el Jefe de la Oficina Telegráfica "...es un grandísimo cachafaz o mejor dicho un gran carajo, instrumento ciego de [Comandante Octavio] Olascoaga, que constantemente viola la correspondencia".<sup>11030</sup> En 1880, cuando la revolución de Carlos Tejedor, el entonces Diputado Nacional Absalón Rojas le escribía a Roca desde Belgrano, que "...no tengo confianza en el telégrafo ni Correo, para correspondencia dirigida a Vd. sé que por lo menos, nuestros telegramas llegan con retardo".<sup>11031</sup> El entonces Subsecretario de Marina Olegario Ojeda le advierte a Roca que

"...jamás te hago telegrama porque sé que primero pasarán por los ojos de [Luis] Cané y después irán al aparato."<sup>11032</sup> Hay orden terminante de avisarte de todo despacho dirigido a tí o por tí y no hay una sola palabra tuya que se le escape".<sup>11033</sup>

Y el entonces periodista Tucumano Benjamín Posse le confesaba a Roca que "...creo que lo han tenido a Vd. sitiado en Córdoba, por medio del telégrafo, durante estos días".<sup>11034</sup> Esto lo creía Posse

"...porque de los seis telegramas que yo le he hecho, algunos tenían contestación, y no he recibido ni un simple acuse de recibo: pienso que solo dejaban pasar, o le trasmitían los que pudieran engañarlo, o meterle miedo para arrancarle su renuncia".<sup>11035</sup>

Terminaba su misiva Posse, negando que su sospecha fuera tanto, "...cuando se trata del mulatón de [Eduardo] Olivera,<sup>11036</sup> capaz de todo eso y mucho mas".<sup>11037</sup> Un año más tarde, el Gobernador de Tucumán Miguel M. Nogués le confesaba a Roca que

"...como Ugarte estaba en el Telégrafo Nacional y por esta razón allí no se guardaba secreto ni para los telegramas que vos diriges me limité a pedirte que no te valieses de esa línea".<sup>11038</sup>

Incluso cuando Nogués se comunicaba con las autoridades de la campaña, las mismas "...me han pedido no lo haga por telégrafo porque no tienen confianza en los empleados".<sup>11039</sup> Convencido Roca entonces de la falta de seguridad en el telégrafo, le escribe a su cuñado Juárez Celman, pidiéndole "...no use del telégrafo para ciertas cosas y aún en sus cartas debe ser muy cauto con ciertas gentes".<sup>11040</sup> Desde Catamarca, el Diputado Nacional Onésimo Leguizamón le informa a Roca que comienza

"...a tomar desconfianza de mi correspondencia por correo porque su Jefe está afiliado con pasión en los adversarios del gobierno, y nadie queda en esta tierra sin estar apasionado o por unos o por otros i servir como instrumento a sus amigos".<sup>11041</sup>

Desde Mendoza, alguien cuya firma no he logrado descifrar le escribe a Juárez Celman que el Gobernador Rufino Ortega

"...piensa que no debo en manera alguna contestar por la misma vía en que Vd. me interroga, pues presume que tanto [Bernardo de] Irigoyen como [Dardo] Rocha, tiene conocimiento de todo cuanto se trasmite por el telégrafo".<sup>11042</sup>

Desde Salta, José M. Fernández le transmitía al Presidente Roca que "...por el telégrafo nada podemos comunicarle a V. E. por que tenemos desconfianza de que nuestros avisos lo sepan los enemigos del orden y la prosperidad".<sup>11043</sup> En Salta, en oportunidad en que el Gobernador Juan Solá pretendía mantener su neutralidad en la lucha por las candidaturas presidenciales de 1886, al Rochista Juan B. Lacroix le fue fácil conseguir de manos de su correligionario el Jefe de la Oficina del Telégrafos de Salta, Don Napoleón Martiarena, la copia de un telegrama del Canciller Francisco J. Ortiz al Ministro de Gobierno Juan M. Tedín, en la que se desmentía dicha conducta.<sup>11044</sup> Y un año más tarde, Pío Uriburu le comunicaba a Dardo Rocha, que él tenía el telégrafo a su servicio "...y sé, con seguridad, lo que se transmite, de manera que difícilmente pueden engañarme".<sup>11045</sup> Desde Concordia, en 1878, Simón Derqui le manifestaba a Dardo Rocha, y José Luis Madariaga a Bernardo de Irigoyen, que debido a la "...mala conducta de los telegrafistas de Concordia [estaba en manos de un niño de diez años]", se hacía indispensable que los renovaran sin demora "...y mientras esto no se haga debe Vd. cuidarse de no comunicar por telégrafo lo que no pueda saberlo el público",<sup>11046</sup> y desde Concepción del Uruguay, el Gobernador Coronel José Francisco Antelo le informaba a Roca en 1879 que el telégrafo "...se hallaba en poder de enemigos declarados, dependientes del Dr. [Saturnino] Laspiur".<sup>11047</sup> Y cuatro años más tarde, en 1883, el ex-Ministro de Hacienda de Entre Ríos, Juan Antonio Mantero,<sup>11048</sup> denunciaba a su condiscípulo de Concepción del Uruguay, el Presidente Roca, que la Oficina Telegráfica de Paraná, dirigida por Ramón Calderón, consulta al Gobernador Gral. Eduardo Racedo "...si se pueden transmitir los telegramas a Buenos Aires".<sup>11049</sup> Esta realidad era para Mantero

"...un escándalo que hace mucho daño, máxime si se tiene en cuenta que tanto esta oficina como la del Paraná suponen que los telegramas dirigidos por mí a Salvatierra tienen un alcance distinto de los demás, porque ellos han seguido toda la evolución política para la elevación de Racedo".<sup>11050</sup>

Y desde Tucumán, en 1885, Carlos M. Maldonado, que oficiaba entonces de Secretario Privado de Dardo Rocha, le confesaba a éste que "...estoy en relación íntima con un alto empleado del telégrafo que me pone al corriente de todo cuanto pasa".<sup>11051</sup> Y cinco días más tarde, le comunicaba que Luis del Carril "...dio instrucciones de ponerse completamente a mi disposición, a la persona que él tenía en el telégrafo [Colombres]."<sup>11052</sup> Esa persona, de apellido Colombres, era "...la misma que antes que Carril viniera ni supiera nada, ya estaba en relaciones conmigo, y que me había dado las copias que le mandé a Vd. y otras que conservo en mi poder reservadas".<sup>11053</sup> Con razón entonces, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con tanta elocuencia que

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".<sup>11054</sup>

Esta situación alcanzó su máximo grado de corrupción en Junio de 1886, cuando los telegramas del Senador Nacional Francisco J. Ortiz dirigidos desde Salta al Presidente

Juárez fueron, al decir de José Fernández López en clave de metáfora campera, "...robados como los ganados de la Pampa por los malones de los beduinos políticos".<sup>11055</sup> El ex-Ministro Eduardo Wilde le contaba a Roca, que había salido del Ministerio

"...por la forma descortéz y hasta ofensiva que usaba Juárez en sus telegramas, tomando pretesto en todo hasta en mentiras y en violaciones de la correspondencia telegráfica".<sup>11056</sup>

Desde Corrientes, en 1891, el Diputado Nacional Justino Solari le expresaba a Roca que

"...sería bueno que nos saquen algunos telegrafistas que nos hacen mucho mal, haciendo saber las noticias a los Cívicos antes que a aquellos a quienes vienen dirigidos los telegramas".<sup>11057</sup>

Para Eleázar Garzón, (a) "Botón-Bumbula",<sup>11058</sup> Gobernador de Córdoba, el valor de la Unión Cívica estaba en el telégrafo, pues "...aquí no tiene nada, en la campaña no los sigue nadie, están haciendo bullaranga y con gritos hacer creer que son algo".<sup>11059</sup> Y desde Catamarca, en 1897, el Gobernador Flavio Castellanos sospechaba que el Jefe de Correos Agustín Sal, "...no guarda la compostura debida revelando la correspondencia telegráfica".<sup>11060</sup> Toda esta realidad hacía que la instrumentación de claves y contraseñas se generalizara haciendo harto difícil el uso de los telegramas y el correo como fuente documental.<sup>11061</sup> Como botón de muestra, Benjamín Posse se dirigió a J. Roca, en oportunidad de convencer al Gobernador de Tucumán Domingo Martínez Muñecas de integrar su Ministerio de Gobierno con un Autonomista en lugar de un Mitrista, con la consigna clave "la pulpería salvada".<sup>11062</sup> Y Rufino Ortega se dirigía al entonces Diputado Nacional Ramón J. Cárcano, en las vísperas del golpe de estado ocurrido en Mendoza en 1888, que en caso de decidirse por el golpe "...sírvasse decirme antes del domingo por telegrama 'mande ganado a Chile'".<sup>11063</sup> Y para aventar las sospechas que recaían en el Correo de San Luis, el líder Rochista Lúndor S. Quiroga le solicitaba al Gral. José M. Arredondo le dirija "...la contestación de la presente con el 'Sra. Doña Carmen L. de Quiroga', pues así creerán que es de su hijo Julio, que siempre le escribe".<sup>11064</sup>

Si no era en las cabeceras de provincia, era en las centrales retransmisoras desde donde se ejercía el espionaje, dirigido por su Administrador General Ramón J. Cárcano.<sup>11065</sup> Desde Tucumán, un tal Luis del Carril le encargaba en 1885 a Carlos M. Maldonado le dijera a Dardo Rocha que

"...era de la mayor conveniencia, que procurase servirse para los despachos telegráficos de las líneas de los Ferrocarriles de Buenos Aires al Rosario, que tienen combinación con la del Central Argentino del Rosario a Córdoba y esta con la del Ferrocarril Central Norte, evitando así servirse de la línea nacional".<sup>11066</sup>

Un año antes, desde Catamarca, Onésimo Leguizamón le advertía a Roca que

"...si no es aquí, en Tucumán, Córdoba o Rosario, que retransmiten los telegramas, serán sorprendidas nuestras confidencias i explotadas por los círculos que se ajitan activamente".<sup>11067</sup>

El espionaje lo practicaban no solo los hombres sino también las mujeres de los Administradores e Inspectores de Correos y Telégrafos. Desde Catamarca, Leguizamón también le advertía a Roca que "...hasta las mujeres son exploradoras o agentes de los

círculos".<sup>11068</sup> Pero el espionaje telegráfico no se limitaba exclusivamente a las provincias argentinas, sino que se extendía a los países vecinos. Desde Santiago de Chile, Juan Cristensen se tomaba la libertad de indicarle al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que

"...sería tal vez prudente que la correspondencia no viniera como oficial, porque en la Administración de Correos aquí hay un empleado que da cuenta de todo".<sup>11069</sup>

Pero el Inspector Pedro López le escribía a Juárez Celman que el Telégrafo Andino era peor que el Trasandino,<sup>11070</sup> pues "...centenares de personas se enteran de la correspondencia telegráfica, empezando por el Administrador del Ferrocarril y siguiendo hasta los guarda trenes".<sup>11071</sup>

### **D-III Las vinculaciones entre la telegrafía y el periodismo.**

La relación entre la telegrafía y el periodismo era muy estrecha.<sup>11072</sup> La larga lista de periódicos titulados El Telégrafo o cuyo título estaba vinculado a la telegrafía prueban este vínculo. Con el título de El Telégrafo salió un diario en Mendoza en 1822, otro en Córdoba en 1853, otro en Concepción del Uruguay, y otro en San Luis entre 1870 y 1875.<sup>11073</sup> En Catamarca, El Andino que circuló entre 1876 y 1881 y El Trasandino dirigido por Segundo Acuña.<sup>11074</sup> Esta íntima relación se prestaba para ejercer el espionaje político. Desde Córdoba, el ex-Diputado Nacional Dámaso E. Palacio le advertía a Roca

"...que todo despacho que llega o sale por la Oficina Telegráfica de ésta [Córdoba], se publica su contenido en los diarios Cívicos. Esto necesita ser prontamente remediado".<sup>11075</sup>

Y en el recorte periodístico que el Gobernador de Córdoba Eleázar Garzón le acompañaba a Roca, le manifestaba que

"...verá que conocen el contenido del telegrama particular que le dirigí a Vd. el Domingo. Y más: un amigo que tengo en el Correo, me dice que estoy vendido [traicionado] en esas oficinas, pues casi todos son opositores".<sup>11076</sup>

También la relación entre la telegrafía y el ferrocarril con la política fue muy íntima pues los registros y resultados electorales se transmitían y enviaban por telégrafo y ferrocarril. Sin embargo, no siempre estos adelantos garantizaban la eficiencia del sistema por cuanto la corrupción penetraba los espacios más insólitos. En Catamarca, mientras en 1873 la viabilidad "...era enteramente difícil y no había medios fáciles de comunicación, llegaban los registros [cívicos o padrones]; hoy [que] tenemos a casi todos los departamentos de la provincia ligados por el telégrafo, [y] tenemos varios de ellos ligados por ferrocarril...los registros [cívicos] no pueden llegar a tiempo".<sup>11077</sup>

Finalmente, el telégrafo sirvió también para dar fe de la legitimidad o legalidad de los documentos oficiales. En 1880, cuando la revolución de Carlos Tejedor, el Presidente Avellaneda dio un decreto al salir para Belgrano declarando a la república en estado de sitio e incitando a los Gobernadores de Provincia a enviar milicias en su auxilio. Como este decreto no pudo transmitirse a Rosario por la interrupción de los telégrafos y medios de comunicación, La República lo publicó asegurando que se había dado, llegando un ejemplar a manos del Teniente Octavio Sosa, quien se lo transmitió a Pedro López,

Inspector de Telégrafos en Córdoba. Como no era un documento oficial y había que legalizarlo para que los Gobernadores de Provincia le dieran cumplimiento, "...asumí la responsabilidad y autentiqué este Decreto trasmitiéndolo para su cumplimiento; lo consulté con Vd. General y con entusiasmo aplaudió mi resolución".<sup>11078</sup>

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción en los ambientes informativos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de censura, propias de la modernidad colonial-absolutista, aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX. De aquí que el telégrafo cumplía un doble rol con respecto a la difusión de las prácticas democráticas. Por un lado, era el instrumento de la represión y del fraude, pero por el otro, al servir a la difusión de la información periodística, cumplía un rol eminentemente progresista. También las prácticas del espionaje y la infiltración estuvieron en boga en dicha época.

### **Epílogo-Sección V-A**

La conculcación de la libertad de cátedra y los niveles de corrupción en los ambientes educativos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas del caudillismo y el militarismo, heredados de la anarquía y las guerras civiles, aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, la conculcación de la libertad de prensa y los niveles de corrupción en los ambientes periodísticos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de la modernidad colonial-absolutista aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX, al extremo de demorar y bastardear el proceso de modernización.

Podemos concluir entonces que los niveles de corrupción en los ambientes informativos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de censura, propias de la modernidad colonial-absolutista, aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX. De aquí que el telégrafo cumplía un doble rol con respecto a la difusión de las prácticas democráticas. Por un lado, era el instrumento de la represión y del fraude, pero por el otro, al servir a la difusión de la información periodística, cumplía un rol eminentemente progresista. También las prácticas del espionaje y la infiltración estuvieron en boga en dicha época.

### **Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder**

Habiendo estudiado en la sección anterior el comportamiento de las elites en los espacios de la cultura, en esta nueva sección nos abocaremos al estudio de dichas elites en los espacios del poder, en seis consecutivos capítulos, titulados el nepotismo y las incompatibilidades de sangre en las provincias, el comicio como encrucijada bélica, la vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas librecambistas, la profesionalización del ejército y las intervenciones federales, y la gerencia de los bancos como teatro de lucha en las "Situaciones" provinciales.

## Capítulo V-B-5

### **Nepotismo e incompatibilidades de sangre.**

#### Índice

- E-I Tradición historiográfica en materia de desequilibrio intra-élite
- E-II Vínculos de parentesco. El caso de Catamarca.
- E-III Matrimonio político. El caso de La Rioja.
- E-IV Gobiernos de familia. El caso de Tucumán.
- E-V Clan de Santa Catalina. El caso de Córdoba.
- E-VI Intervenciones anti-dinásticas. El caso de San Luis.
- E-VII Guerra clánica. El caso de Salta.
- E-VIII Círculo de parientes. El caso de Entre Ríos.
- E-IX Oposición de Pellegrini. El caso de Santa Fé.
- E-X Continuidad nepótica. El caso de Mendoza.

#### **Introducción del capítulo V-B-5**

En este trabajo trataremos de probar que la inestabilidad, desintegración y corrupción políticas serían más bien el resultado de una desigual composición orgánica de la sociedad misma, es decir de un desequilibrio en la composición de la elite vis à vis la composición de clases de la sociedad, que se manifestaba en una falta de correspondencia entre la velocidad de circulación de las elites y la movilidad de las clases sociales. A una mayor movilidad de las clases sociales, es decir, a una más intensa sociedad liberal-burguesa, debería haber correspondido una mayor autonomía y velocidad en la circulación de las elites, y viceversa. En una sociedad donde el factor elite era intensivo, es decir las elites eran numerosas en relación a la composición de clases de la sociedad, los miembros de la elite se habrían radicalizado en favor del liberalismo más intensamente que la masa de la sociedad. En tales sociedades, los miembros de las elites se habrían hallado en el mismo bando político, en apoyo del liberalismo. En el sentido arriba apuntado, cabe entonces preguntarse:

- a) ¿el eje de los discursos republicanos se trasladó a fines de siglo de la problemática inicial del caudillismo a los efectos nocivos del nepotismo y la política de notables?
- b) ¿las causas del nepotismo obedecían a la baja intensidad del proceso inmigratorio?
- c) ¿bastaba que las provincias contaran con fuertes dosis de inmigración externa para que estuvieran inoculadas contra el nepotismo?
- d) ¿para combatir el nepotismo era preciso que existiera una sobreoferta de bachilleres o universitarios que aspiraran a ingresar a las filas de la elite política?
- o bien, e) ¿el nepotismo emergía como una demanda de los electorados por una marca de prestigio que les garantizase la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos?

Según las tesis de Lewin (1979), la estrategia predominante para copar el aparato de un estado oligárquico consistía en producir coaliciones políticas con cuñados o futuros cuñados. Sin embargo, según Sommariva (1929), si bien el liberalismo Roquista toleraba

la oligarquía, pues aceptaba que los gobernantes impusieran sus sucesores, es sabido que abominaba del nepotismo.<sup>11079</sup>

Aparentemente, la lucha librada por la Revolución de Independencia y la llamada Organización Nacional contra el imperial-absolutismo (patriarcalismo, nepotismo, señorialismo, corporativismo, patrimonialismo, etc.) fue en parte en vano, por cuanto durante la segunda mitad del siglo XIX, se sucedieron entre los gobernadores del antiguo Virreinato del Río de la Plata los parentescos más intensos de que se tenga memoria. En Salta, producida en Caseros la caída de Rosas, entró a dominar el Partido Constitucional, formado esencialmente por las familias de los Puch y los Güemes, duramente enfrentado con el partido liberal, el cual estaba fundamentalmente integrado por la familia de los Uriburu.<sup>11080</sup> Si bien la familia Güemes, estudiada por Haigh (1963-68), nunca constituyó un clan al estilo de la de los Uriburu, los Arias, los Cornejo o los Figueroa, sí logró formar una dinastía política que se perpetuó a lo largo de un siglo, en tres generaciones de la misma familia (Ver Cuadro S-VIII). Y en La Rioja, el clan que prevaleció fué el de los Villafañe. Al Gobernador Fernando Villafañe Gordillo,<sup>11081</sup> le sucedió en 1861 su hermano Domingo Antonio Villafañe Gordillo.<sup>11082</sup>

### **E-I Tradición historiográfica en materia de desequilibrio intra-élite**

A fines de siglo, en medio de un notorio auge económico que obligó a las autoridades monetarias a retornar a la convertibilidad del papel moneda,<sup>11083</sup> el problema más grave a dilucidar era el de la muy lenta circulación de las elites políticas, que se hallaba hondamente postergado, comparado con el problema de la movilidad social, que la inmigración Europea, exenta en gran medida de tradiciones pre-modernas, había acentuado a una intensidad desconocida hasta ese entonces. La práctica del nepotismo, que frenaba la circulación de las elites políticas, atentaba contra la vigencia de preceptos modernos tales como: a) las incompatibilidades de sangre, b) la división de poderes, y c) la periodicidad de los cargos públicos, y por consiguiente contra el régimen republicano de gobierno.<sup>11084</sup> Mientras el estudio del neo-colonialismo, el imperialismo informal y el colonialismo interno fueron tenidos por el positivismo, al igual que los Orientalistas en el Asia, como materia irrelevante para la producción de conocimiento,<sup>11085</sup> fenómenos tales como las guerras, el federalismo y el nepotismo fueron considerados como supervivencias del Antiguo Régimen Colonial o fracturas pre-modernas (genéticas), subsistentes en el régimen republicano, es decir como condiciones iniciales de las inciertas evoluciones políticas.<sup>11086</sup> Grasserie (1899) sostuvo que la transmisión hereditaria del poder, o nepotismo, era una supervivencia o "sedimento persistente de la tradición señorial".<sup>11087</sup>

Pero para la corriente nacionalista --que no renegaba de la familia extensa, representada entre otros por Funes (1942-51), seguido por Masini Calderón (1967) y por Martínez (1979)-- los "gobiernos de familia" recién se habrían inaugurado a partir de la batalla de Pavón (1862). Según Ramos (1970), un nacionalista de izquierda, la diferenciación geográfica de los "gobiernos de familia" es preciso practicarla sólo en el análisis de la Argentina del 80 y del 90, no así luego de la dispersión del roquismo (1904 en adelante), "...en que se fundirán para siempre en una sola y misma clase".<sup>11088</sup> Y para una nueva tendencia, que volvió a poner el foco de atención en el estado (Lohmann Villena, 1974), el nepotismo podía distinguirse entre aquel que era lineal o dinástico, y que no atravesaría la red de instituciones y partidos políticos; de aquel otro transversal u horizontal, que sí atravesaría la red de casamatas burocráticas, partidos y facciones políticas y fronteras provinciales.<sup>11089</sup> El primer tipo de nepotismo sería el caracterizado

por Botana (1977), quien se limita sólo a acumular los apellidos que se repiten y en adjuntar actores con el mismo apellido que desempeñaron los cargos de gobernador, senador nacional, ministro o diputado nacional.<sup>11090</sup> El segundo tipo de nepotismo sería el descrito por Lewin (1979), quien analiza el caso del nordeste Brasileño. Para esta autora la estrategia predominante para copar el aparato de un estado oligárquico consistía en producir alianzas políticas con cuñados o futuros cuñados.<sup>11091</sup>

Como en toda sociedad la elite es esencialmente heterogénea, es preciso tener en cuenta la composición interna de la misma, es decir el peso relativo que las elites modernas (abogados, médicos y periodistas) tuvieron vis à vis las elites pre-modernas (clérigos y militares). En esa heterogeneidad, se deberán observar también las fracturas modernas (ideológicas y políticas) que hacían que así como existieron clérigos, jueces y militares tradicionales alineados con las corrientes políticas más reaccionarias también existieron clérigos, jueces y militares modernos encolumnados con los actores políticos más progresistas. A los efectos de esta investigación adoptamos los métodos de las redes parentales de Lewin (1979), y la transmisión intergeneracional o del ciclo de vida del compromiso político de Converse (1969), para quienes la estrategia predominante para copar el aparato de un estado oligárquico consistía en producir coaliciones políticas con cuñados o futuros cuñados.<sup>11092</sup> Y para la tesis de Laband y Lentz (1985), acerca de la transferencia de riqueza intergeneracional entre políticos, sería preciso distinguir el nepotismo de la modernidad tardía, que surge como una imposición o supervivencia de la sociedad estamental, de aquel otro nepotismo de los capitalismos avanzados que emerge como una demanda del electorado por una marca de prestigio que le garantice la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos.

Finalmente, para Nancy y Lacoue-Labarthe (1983) y Deleuze (1987), autores pertenecientes a la escuela de la post-modernidad, la reiterada sucesión de transiciones progresivas y regresivas, estaría ligada no con las respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo proponía una lectura estructuralista (Wright, 1975; y Sábato, 1988), sino con los cambios en las prácticas o estrategias discursivas, los cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser desconstruidos buceando en la genealogía de sus elementos constitutivos.<sup>11093</sup> Es mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido a lo largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras pre-modernas y modernas. Pero lo que la historiografía científico-política no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre las prácticas nepóticas y la naturaleza de los regímenes electorales, judiciales, educativos y comunicacionales (periodismo y telegrafía).<sup>11094</sup>

## **E-II Los vínculos del parentesco. El caso de Catamarca.**

En Catamarca, para 1880, el ex-Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa,<sup>11095</sup> enfrentado al clan de los Acuña, le transmitía confidencialmente a Roca que

"...en la actualidad [1880] tiene Vd. de Senador a Don Samuel Molina,<sup>11096</sup> tío carnal del candidato [Joaquín Acuña Molina], [y] tío abuelo de [Diputado Nacional] D. Julio P. Acuña...hacen de las Diputaciones y Senadurías un patrimonio de familia".<sup>11097</sup>

Tres años después, el mismo Figueroa lo consultaba al Ministro Victorino de la Plaza acerca de cual sería la actitud que adoptaría el Gral. Octaviano Navarro, siendo que el Gobernador Acuña (yerno del Gral. Navarro) tiene

"...toda su familia vinculada por parentesco al círculo Molinista, puesto que los dueños o socios de la Casa Molina Hnos. son su hermano D. Niceo Acuña, su tío carnal D. Mardoqueo [Molina Bazán],<sup>11098</sup> y su sobrino carnal D. Saturnino Gutiérrez".<sup>11099</sup>

Una década más tarde, en 1892, el Diputado Nacional Rafael Castillo se preguntaba si la conducta partidista desplegada en las elecciones no estaría ligada a la circunstancia que

"...el gobernador de la provincia [Gustavo Ferrari], ligado por vínculos de parentesco al señor diputado electo [Juan José Ibáñez] y al juez federal [Francisco Caracciolo Figueroa], lo mismo que el juez federal, ligado también por vínculos de parentesco al señor diputado electo".<sup>11100</sup>

Al año siguiente, en Junio de 1893, con motivo de sucesos revolucionarios acontecidos en dicha provincia, el Ministro del Interior Wenceslao Escalante,<sup>11101</sup> conspicuo dirigente del PAN, se vio obligado a presentar la renuncia.<sup>11102</sup> Otro año después, el 1 de Octubre de 1894, el Diputado Nacional Delfor del Valle denunciaba que la situación de Catamarca era "...una verdadera oligarquía,...o algo peor, un verdadero nepotismo".<sup>11103</sup> Para ejemplificar su aserto Del Valle relataba que el que finalmente resultó Gobernador de Catamarca, el Sr. Julio Herrera González,<sup>11104</sup> era pariente de los dos diputados electos, también parientes, señores Gustavo Ferrari y Flavio Castellanos Díaz de la Peña; que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Pío Cisneros,<sup>11105</sup> y el Presidente de la Legislatura Adolfo Castellanos,<sup>11106</sup> eran primos del Gobernador; y que Castellanos fue reemplazado por el Sr. Mauricio Herrera González, hermano del Gobernador (ver Cuadro CAT-I).<sup>11107</sup> En la administración de la provincia no había empleado que no llevara "...algún apéndice de Herrera o de algún pariente de éste".<sup>11108</sup> A propósito de ello, Del Valle agregaba con fino humor que "...en Catamarca dicen que los pobres desheredados de la fortuna andan a la caza de un apéndice de Herrera para poder colarse en el gobierno!".<sup>11109</sup> Dos años después, en 1896, en oportunidad de la nueva elección para Gobernador, en la cual el candidato era Don Flavio Castellanos, el político Tucumano José V. García le comunicaba a Roca que Don Julio Herrera, y sus dos cuñados, Flavio y Adolfo Castellanos

"...hacen solos estos trabajos, no comunican a los amigos que forman todos el partido, lo que demuestra evidentemente que quieren prescindir de ellos, y de lo cual se desprende lógicamente, que es porque sospechan que no están conformes con el candidato y temen una fuerte resistencia".<sup>11110</sup>

Los Radicales y los Separatistas (Castillistas o partidarios de Rafael Castillo), estaban a juicio de García,

"...igualmente indignados con tal candidato de la familia, y están mudos sin hacer nada, porque creen inútil luchar contra vos, que creen sostiene a este Gobierno, y apruebas estas transmisiones del mando entre parientes, esto es: que continúe la oligarquía actual".<sup>11111</sup>

Como será este nepotismo exclamaba García, que al Dr. Francisco Caracciolo Figueroa, y a Luis Herrera,<sup>11112</sup> sobrino del Gobernador Julio Herrera,

"...les he oído por repetidas veces, que ellos se opondrán a que ningún pariente de los Herreras o de los Figueroas, sea Gobernador, porque ya sería a mas de inmoral, insostenible la continuación del nepotismo".<sup>11113</sup>

También les había oído a Caracciolo y Luis Herrera que convendrían con Don Julio Herrera en que el candidato a Gobernador "...fuera cualquiera, no siendo pariente de ninguno de los dos".<sup>11114</sup> Mientras Don Luis Herrera sólo contaba con su padre el Senador Mauricio Herrera y con un hermano Diputado, Caracciolo contaba con el Senador Félix Avellaneda, y los Diputados Maximino Reyes y Osvaldo Gómez.<sup>11115</sup> Por mas que Julio Herrera hubiere hecho declaraciones en contra de la candidatura de su cuñado Flavio Castellanos, que tantas satisfacciones le diera al Senador Caracciolo Figueroa, el Diputado Nacional Juan J. Ibáñez lo creía a Herrera "...obstinado en llevar a su sucesión a uno de sus hermanos políticos".<sup>11116</sup> Cosas pasadas y presentes, lo autorizaban a Ibáñez a creer que Herrera se mantendría firme en el propósito, "...ganando tiempo con declaraciones satisfactorias para efectuar la imposición cuando en verdad no haya tiempo para sofrenarlo".<sup>11117</sup> Las acusaciones de nepotismo no cesaron a comienzos de 1897, al extremo que José V. García le explicaba al General Julio A. Roca que

"...todo el mundo es opositor: los que se llaman radicales que ahora son Roquistas, los Separatistas, y los del Partido Nacional, todos están entendidos y en breve tiempo se fundará el Club y el Comité respectivo para luchar contra el nepotismo".<sup>11118</sup>

Un año más tarde, en 1898, y con motivo del intenso nepotismo desplegado por la familia Castellanos, se formó en Catamarca la llamada Unión Provincial y su correspondiente Junta de Guerra,<sup>11119</sup> la que dió un manifiesto al pueblo.<sup>11120</sup> Esto dio lugar a permanentes rumores de revolución y a un frustrado estallido el 23 de Septiembre de 1899 que terminó con la ejecución sumaria de sus protagonistas (Antonio Rivera y Ramón Barros).<sup>11121</sup> Otro año más tarde, en 1899, el Partido Nacional seguía subdividido en cuatro facciones: Figueroístas, Castellistas (separatistas), situacionistas (los caídos), y Herreristas,<sup>11122</sup> originando así no un dilema entre dos jugadores sino entre cuatro jugadores. En Octubre de 1899, Miguel Cané y Valentín Virasoro, Veedores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, denunciaban que en la administración de Flavio Castellanos "reinaban el desorden y el nepotismo".<sup>11123</sup> Cané y Virasoro también denunciaban que la Legislatura

"...está compuesta en su casi totalidad de parientes, que al mismo tiempo se han repartido todos los empleos de la administración, empezando por los altos cargos y terminando por los puestos más humildes del servicio municipal o policial".<sup>11124</sup>

Para mayor abundamiento, el Diputado Nacional por Catamarca Delfín Gigena,<sup>11125</sup> manifestaba que en su provincia se había "...hecho un gobierno puramente de familia", y el Diputado Nacional por Córdoba Rufino Varela Ortiz denunciaban que en Catamarca estaba entronizado "...un nepotismo odioso".<sup>11126</sup> En cuanto a la oposición, el Diputado Nacional por Catamarca Félix F. Avellaneda,<sup>11127</sup> revelaba la naturaleza intra-oligárquica de los conflictos políticos desatados en el interior del país, región donde no se había experimentado la inmigración masiva, al afirmar que "...hermanos y sobrinos de los que gobiernan, figuran en la oposición".<sup>11128</sup> Más aún, por el sólo hecho de simpatizar con la

revolución contra Castellanos, sin haber tomado las armas en ella, los hombres del oficialismo, "...persiguen a sus mismos parientes".<sup>11129</sup>

### **E-III Un matrimonio político. El caso de La Rioja.**

En La Rioja, en 1880, Don Francisco Álvarez,<sup>11130</sup> quien pasó a dominar la situación, rompiendo con el Autonomismo,<sup>11131</sup> y desplazando al Senador Nicolás Barros,<sup>11132</sup> eligió para Gobernador en 1880 a Francisco Vicente Bustos González,<sup>11133</sup> bajo cláusulas condicionadas. Estas consistían en la original garantía que: 1) se casaría con Delfina Álvarez, su hija, tan luego como la muchacha llegara a los 14 años; 2) Álvarez sería el Gobernador sucesor de Bustos, a trueque del servicio que le prestaba; y 3) Álvarez tendría el derecho a elegir los Jueces Departamentales y de Primera Instancia en toda la Provincia.<sup>11134</sup> A Francisco Vicente Bustos (dueño de un área de 26 leguas de campo, sobre las líneas férreas), tres veces gobernador autonomista (roquista), lo iba a heredar entonces su propio suegro Francisco Álvarez, pero por su muerte lo heredó su cuñado Baltasar Jaramillo, quien a su vez era yerno de Bustos (Cuadro LR-I).<sup>11135</sup>

Dos décadas más tarde, en 1898, con motivo del eterno continuismo del Gobernador Francisco Vicente Bustos, de su participación en la apropiación de tierras,<sup>11136</sup> y de su nepotismo --había designado como su sucesor a su sobrino el Senador Antonio P. García-- se produjo un estallido revolucionario que provocó la intervención federal a cargo del Dr. Benjamín Figueroa.<sup>11137</sup> Habiendo levantado el Gobernador Francisco V. Bustos en marzo de 1898 como candidato a Gobernador a su sobrino el Senador Antonio P. García, hizo sospechar que ella obedecía al interés de que García le reservara la banca de senador cuando él dejara el gobierno. En efecto, a comienzos de marzo de 1898 la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado provincial no obedecía a otro propósito, según Catalán, sino a perpetuarse en el poder

"...a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de Bustos, renunciar este el Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino García".<sup>11138</sup>

Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar interminable",<sup>11139</sup> lo cual finalmente provocó el 23 de abril de 1898 una insurrección o levantamiento popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista. Bustos en tanto se encargó de disminuir la importancia del acontecimiento manifestándole a Roca que "...lo que se dijo al principio que era una revolución, era sencillamente una asonada la cual pude al día siguiente despararramar".<sup>11140</sup> No obstante ello, Bustos y García presentaron sus renunciaciones y Carreño fue electo Gobernador. A esa política de círculo familiar, no escaparon según refiere Bazán (1979), ni siquiera los enemigos del Bustismo, como era el caso de Joaquín V. González, miembro del partido Carreñista, quién predicaba la necesidad de una efectiva democracia.<sup>11141</sup>

De la extensa nómina de gobiernos elegidos por los acuerdos de clanes, en 1901, luego de la derrota del Bustismo, figuró el gobierno de Wenceslao Frías, quién contó con el apoyo de su cuñado Leónidas Carreño Villafañe,<sup>11142</sup> quién a su vez era el instrumento de su conculado el Ministro del Interior, Joaquín V. González Dávila.<sup>11143</sup> También a

comienzos de siglo continuaban los gobiernos oligárquicos. En oportunidad del reportaje hecho al Diputado Nacional Dr. Leónidas Carreño, en el único periódico de oposición, denominado El Independiente, se hizo aparecer la administración del Gobernador Arcadio de la Colina como un verdadero desastre. Dudando que fuera un amigo el que así se expresaba públicamente, en un periódico de oposición a la situación nacional y provincial, De la Colina procuró en vano una rectificación.<sup>11144</sup> La Rioja en 1906, a juzgar por los juicios que proporciona Reyes (1915),<sup>11145</sup> y los datos que provee Bazán (1967), estaba manejada por una oligarquía, pues

"...dos familias, los González y los Carreño, eran siempre las llamadas a dirimir las posiciones más espectables. Cuando se acercaba el momento de su vacancia, el Dr. Joaquín V. González, líder del roquismo, era el encargado de digitar las candidaturas consultando ordinariamente la opinión de su cuñado el Dr. Leónidas Carreño".<sup>11146</sup>

Lo mismo ocurrió en 1910 con el gobierno de Guillermo San Román Dávila,<sup>11147</sup> pues a último momento, cuando el gobierno llegaba a su fin, y contando con el apoyo del autonomismo, Dávila rompió el acuerdo tratando de imponer la candidatura de su sobrino el Dr. Julio San Román.<sup>11148</sup>

#### **E-IV Los gobiernos de familia. El caso de Tucumán.**

Desde Tucumán, Benjamín Posse advertía que con la Organización Nacional, en 1880, el mandato era enviar al Congreso al primo hermano del ex-Presidente Avellaneda, Don Agustín de la Vega,

"...que apuntarán hacia donde Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más favorable y más honroso para ellos, no servirán para nada cuando se presente una situación un tanto embarazosa, en que sea necesario poner a prueba la inteligencia o el temple de alma de cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que considero inevitable) y no tengan razón de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un desencanto prematuro".<sup>11149</sup>

Pero pese al clima revolucionario desatado por la Revolución del 90, contra la corrupción y los gobiernos de familia, estos se perpetuaron. Mediante un procedimiento político-constitucional, el clan de los Padilla (Ver Cuadro T-II) no abandonaba, a juicio de Benjamín Aráoz, "...su propósito de fundar una oligarquía".<sup>11150</sup> Esta apreciación de Aráoz la corrobora José Olmos en carta a Roca, en oportunidad de las elecciones a Senador Nacional, donde le advierte que los Padilla "...trabajan por bajo de cuerda por la candidatura de Tiburcio o de Ángel [Padilla],<sup>11151</sup> cualquiera de los dos, porque así es esta gente, no lo dude".<sup>11152</sup> En cuanto a los Liberales Históricos, compuestos por los Padillas y los Frías (con algunos Zavalías en ancas),

"...se desviven por el poder, con los anhelos avarientos de una especulación de familia, enfermiza; pero tienen miedo y no se atreven a asomar la nariz; temen los odios universales latentes contra ellos, y tienen a los ruidosos Pedros (Pedro Alurralde y Pedro Ríos) de cortina de sus ambiciones".<sup>11153</sup>

Más aún, según Pedro B. Medina, en carta a Roca,

"...los Padillas pensaron en un principio hacer trabajo a fin de ver si conseguían la reelección [como diputado nacional] de Vicente [Padilla Domínguez], pero temerosos (según ellos) de producir divisiones en el partido, nada han hecho, sé esto de boca del mismo Isaías [Padilla Puente]".<sup>11154</sup>

Finalmente, el propio Aráoz, le confesaba a Roca que se había producido en toda la provincia de Tucumán

"...un movimiento de opinión imponente,...,por la resistencia que hay contra los gobiernos de familia, y el peligro que descubren en el gobierno de Pedro G. Méndez".<sup>11155</sup>

Esta peligrosa tendencia continuaba al año siguiente, pues Aráoz le transmitía a Roca sus temores de quedar repudiado, pues

"...la tendencia ha de ser desalojar de sus posiciones en la Legislatura y en los Consejos de Gobierno a los que no posean trapiche de fierro ni casa con balconcitos de mármol".<sup>11156</sup>

Todos los poseedores de ingenios, como Pedro Méndez, se creían por derecho propio, candidatos necesarios al gobierno, y no aceptaban, según lo recordaba Lucas Córdoba,

"...la posibilidad de trepar al poder sino cabalgando en trapiche; pero, cuando se pronuncia el nombre de cualquiera de ese gremio industrial, subteréanse las rivalidades y presunciones de todos hasta aplastar a su congénere, lo que juzgo una suerte para la Provincia en la mayoría de los casos".<sup>11157</sup>

Entre estos "...puros ases que excluyen a los desheredados de la fortuna", figuraban los dueños de ingenios azucareros Clodomiro Hileret,<sup>11158</sup> Ambrosio Nougues Romero,<sup>11159</sup> Brígido Terán Silva,<sup>11160</sup> Delfín Gigena,<sup>11161</sup> Juan Posse Talavera, etc. Hileret era entre ellos,

"...el Nabad del nuevo partido en ciernes, cuyo principal móvil es crear una hegemonía especial de industriales, y cuyo interés político es ver figurar a su cuñado y amigo Sr. Delfín Gigena".<sup>11162</sup>

La ponderación de la opinión pública, por una ley normal del progreso, había destruido, para Don Lucas, los gobiernos de familia:

"...a los Conspicuos en Jujuy; a los Uriburus en Salta; a los Posse, con el fraile Campos, a los Padilla, y a los Paz, Colombres y Terán en Tucumán; a los Taboada en Santiago; a los Navarro y Molinas en Catamarca; a los Dávila y Ocampo, y últimamente Bustos y parentela en La Rioja; a los Rojo en San Juan; a los González en Mendoza; a los Daract y Barbeito en San Luis; a los Pizarros en Córdoba; a los Cullen y últimamente los Iriundos en Santa Fé".<sup>11163</sup>

Una década más tarde, a comienzos del siglo siguiente, no obstante las ejemplares gestiones administrativas de los gobernadores Benjamín Aráoz y Lucas Córdoba,<sup>11164</sup> y haber transcurrido las gestiones de Próspero Mena,<sup>11165</sup> y José Antonio Olmos,<sup>11166</sup> la continuidad nepótica habría reaparecido en la Legislatura y en el Colegio Electoral, a tal extremo que fue preciso una intervención federal, la cual se concretó en septiembre de

1905 en la persona del Senador Nacional Jujeño Domingo T. Pérez.<sup>11167</sup> Pero es recién a partir de 1906, que el Gobernador Ing. Luis F. Nougués Terán reiniciaba una dinastía de gobernadores y parlamentarios emparentados entre sí e íntimamente vinculados a la industria azucarera (ver Cuadro T-IV y Apéndice T-IV), la cual comenzando con el Ing. Luis F. Nougués Terán se continuaba con las administraciones de su tío segundo José Frías Silva,<sup>11168</sup> y con la de su primo Ernesto Padilla Nougués.<sup>11169</sup> Un lustro más tarde, en 1911, y con motivo de una polémica sostenida por el Diputado Nacional Ernesto Padilla, acerca del régimen vigente en Tucumán, el Diputado Conservador por Córdoba José Miguel Olmedo, con cuñado de Ramón J. Cárcano, sostenía que la República Argentina sin excepción ha sido gobernada por oligarquías. En cada provincia, aseguraba Olmedo, regía una oligarquía: "...la suma de estas oligarquías hacía la gran oligarquía nacional".<sup>11170</sup> Esta última, cuando en 1880 se consagró la Capital de la República, había adquirido características irresistibles, producto de una sumatoria aritmética y no de un vector de fuerzas. Desde entonces, para aquellos que no estaban comprendidos en una oligarquía local concordante "...no se dejaba filtrar un [solo] rayo de esperanza".<sup>11171</sup>

#### **E-V El Clan de Santa Catalina. El caso de Córdoba.**

En Córdoba, si hemos de creerle al sanjuanino Saturnino Laspiur,<sup>11172</sup> en la época de la intervención del Gral. Emilio Conesa (1864) hegemonizaba el poder político el clan de los tres hermanos Pizarro (Laureano, Manuel Dídimo y Romualdo), hijos de Manuel Estéban Pizarro,<sup>11173</sup> antiguo guerrero de la Campaña del Brasil, y sobrinos de Modestino Pizarro, Ministro de Gobierno de Roque Ferreyra, uno de los fundadores del grupo liberal de Córdoba (ver Cuadro COR-I).<sup>11174</sup> Ellos tenían en su haber, en opinión de Terzaga (1976), la organización de dos revoluciones, la ocurrida en Mendoza contra Alejo Mallea (1852) y la acontecida en Córdoba contra el Gobernador Manuel López (a) Quebracho (1852). Refiriéndose a los hermanos Pizarro, Saturnino Laspiur le manifestaba en 1865 al Vice-Presidente Marcos Paz que

"...ellos son aquí un poder, que pesa sobre el gobierno y sobre la sociedad sin contrapeso alguno, de una manera tan descaradamente violenta y arbitraria que es escandalosa".<sup>11175</sup>

Sin embargo, los Pizarro, si bien constituyeron un clan político no alcanzaron a perpetuarse dinásticamente, como lo hicieron en el pasado colonial cordobés los Echenique y los Allende, por cuanto fueron desplazados, a juicio de Cárcano (1969), durante la vigencia del Autonomismo, por la irrupción del llamado Clan de Santa Catalina, compuesto por los descendientes del Gobernador José Xavier Díaz. El denominado Clan de Santa Catalina, produjo tres presidentes [Roca, Juárez Celman, y Figueroa Alcorta], un vicepresidente [Roca (h)], varios gobernadores [Juárez Celman, Gavier Figueroa, Figueroa Alcorta, Roca (h), Frías Díaz Allende], jueces, senadores, y diputados".<sup>11176</sup> El propio Miguel Juárez Celman, cuando Gobernador de la Provincia de Córdoba, impuso como su sucesor a su primo hermano político Gregorio Gavier Figueroa,<sup>11177</sup> miembro de la llamada "Liga de Beduinos",<sup>11178</sup> y luego cuando Presidente de la República impuso como Gobernador a su medio hermano Marcos Juárez. Sólo entre los senadores provinciales he podido hallar una decena de miembros de esta familia.<sup>11179</sup> A ello podríamos agregar, que dicho Clan también produjo su propia oposición pues en 1886 el candidato de los Partidos Unidos a la Presidencia de la República fue otro condómino de Santa Catalina, Don Manuel José de la Cruz Ocampo y Gonsález,<sup>11180</sup> primo hermano carnal de Felipe Díaz y de la suegra de Roca y Juárez Celman.

Décadas más tarde, en tiempos en que gobernaba el Dr. José Manuel Álvarez,<sup>11181</sup> con motivo de la vacante dejada en el Senado por la promoción de Figueroa Alcorta a la Vice-Presidencia de la República,<sup>11182</sup> el ex-Gobernador y Senador Nacional Gregorio Gavier,<sup>11183</sup> le informaba a Roca que

"...se está solicitando aisladamente de los miembros de la Legislatura el voto para elegir Senador a Dermidio A. de Olmos, hermano del nuevo Gobernador [José Vicente Olmos], y me aventuro a creer por lo tanto que tendrá su aquiescencia".<sup>11184</sup>

Sin embargo, al día siguiente, 21 de Mayo, el Gobernador Olmos, quien luego de su mandato pasó al Senado, le aclaró a Roca que al momento de conocer los trabajos para la elección de su hermano Dermidio "...los desaprobé franca y terminante, en presencia del Dr. [Gerónimo L.] del Barco y de otros amigos que me pedían prescindencia en la cuestión".<sup>11185</sup> Finalmente, es conocido el caso del Presidente Figueroa Alcorta, quien al no lograr desprender al Gobernador José Antonio Ortiz Herrera,<sup>11186</sup> de la influencia nociva de Roca, envió como Interventor al ex-Diputado Nacional por Tucumán Eliseo Cantón.<sup>11187</sup> Aprovechando la intervención, y los errores cometidos por el Intendente Municipal derrocado, se formó un partido que se llamó Unión Provincial "...donde entraron de buena fe muchos hombres independientes, los amigos del Presidente Figueroa y algunos Radicales, dado que el partido en aquel entonces no hacía campaña activa".<sup>11188</sup> Muchos de sus integrantes se separaron después de esa fuerza y volvieron al Partido Radical. Pero entre los que quedaron en ella, "...después de formar el Partido Constitucional, formaron la Concentración, después el Partido Demócrata Progresista, que hoy [1919] se encuentra separado del partido Demócrata Progresista de la Capital Federal y unido al Partido Conservador".<sup>11189</sup>

## **E-VI Las intervenciones anti-dinásticas. El caso de San Luis.**

En San Luis, en 1904, el Senador Lúndor Quiroga no había perdido las mañas, pues a juicio de Eriberto Mendoza puso todo su empeño "...en que la oposición proclamase candidato a Gobernador un amigo suyo lo que no ha conseguido, aceptando por fin un candidato revolucionario el rengo [Benigno] Rodríguez Jurado, que es Pellegrinista".<sup>11190</sup> En dicho año, el gobierno federal se vio obligado, en virtud de un movimiento popular que había derrocado a los Mendoza, a intervenir San Luis nuevamente, apoyado desde el Senado por Don Bernardo de Irigoyen.<sup>11191</sup> La nueva intervención argüía para justificar su rol en que el entonces Gobernador Jerónimo Mendoza Lucero,<sup>11192</sup> y su hermano el tres veces Senador Nacional Eriberto Mendoza (1892-1919) habían establecido una suerte de régimen aristocrático o dinástico, reñido con el régimen republicano de gobierno.<sup>11193</sup> Un amigo de Roca, el Interventor Francisco Beazley, constataba que

"...la inmensa mayoría de esta ciudad es decididamente hostil a los Mendoza, con una hostilidad violenta, casi rabiosa, que muy bien podría llegar hasta el crimen, en caso de reposición".<sup>11194</sup>

El sucesor de Jerónimo Mendoza, el Gobernador Don Benigno Rodríguez Jurado,<sup>11195</sup> pertenecía a su vez a otra dinastía política (ver Cuadro SL-I). Fue el primero electo luego de la revolución que derrocara a los Mendoza, para sufrir más luego la traición a manos de sus propios sobrinos, pues estos se le alzaron en 1906.<sup>11196</sup> Dicho alzamiento o motín policial perseguía impedir que se hiciera cargo de la administración el segundo gobernador

revolucionario Dr. Estéban P. Adaro, quien aunque Autonomista fue electo por las mismas fuerzas populares que habían derrocado la dinastía de los Mendoza.<sup>11197</sup> En realidad, según Melo (1964), al decidir Adaro hacer gobierno prescindiendo de sus coaligados de la víspera (Republicanos y Nacionalistas), estos últimos alzaron a las fuerzas policiales, impidieron su asunción del mando y constituyeron una Junta Revolucionaria (1907).<sup>11198</sup> Enviada la Intervención Federal del Santafesino Manuel M. de Iriondo, éste último finalmente entregó el gobierno a Adaro.

## **E-VII La guerra clánica. El caso de Salta.**

En Salta, las luchas políticas se personificaron entre el clan de los Ovejero y el viejo clan de los Ortiz, aquel que había luchado contra el más antiguo clan de los Uriburu. El responsable de enfrentar a los Ovejero fue un joven político y empresario, con fuertes dotes personales que le sirvieron para forjarse una imagen de pionero o "self made man", llamado Robustiano Patrón Costas, (a) "Gata Polveada".<sup>11199</sup> Cuando en 1906 contaba sólo con 26 años de edad, y ya había sido Ministro de Hacienda de Ángel Zerda Medina,<sup>11200</sup> --enfrentó al Gobernador David Ovejero Zerda (1904-06), quien se impuso a sí mismo como Senador Nacional y pretendía imponer como Gobernador a Luis Linares Usandivaras.<sup>11201</sup> Para evitar ello Patrón propiciaba la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola,<sup>11202</sup> bajo la divisa de la Unión Popular.<sup>11203</sup> En aquellas luchas políticas Don Robustiano llegó a decir refiriéndose al Vice-Gobernador y Presidente de la Cámara de Senadores Don Ángel Zerda, a su sobrino segundo el Gobernador David Ovejero Zerda, y al candidato a Gobernador Don Luis Linares Usandivaras que "...una familia se ha adueñado del poder y ha ocupado todas las posiciones de alguna importancia".<sup>11204</sup> Los que inspiraban las resoluciones gubernamentales no eran, según Patrón Costas, ni un partido ni un hombre, sino "...los intereses de la familia [Ovejero Zerda] o las conveniencias particulares de cada uno de sus miembros".<sup>11205</sup> Seguía denunciando Don Robustiano que

"...convertida la Provincia en feudo y convencidos de que espigaban en campo propio, han cerrado sus filas y por eso es que hoy en la contienda solo pueden presentar sus legiones de magistrados, funcionarios de policías y coroneles de campaña".<sup>11206</sup>

A tal extremo llegaba la falsía y la deslealtad del régimen imperante que Patrón continuaba afirmando

"...se llega a declarar por el órgano oficial que los empleados públicos tienen el deber y la obligación de sostener al gobierno porque 'deben estar con el amo que les da de comer'".<sup>11207</sup>

Dos semanas más tarde un numeroso grupo de ciudadanos salteños,<sup>11208</sup> aunando sus quejas a las proferidas por Patrón Costas, denunciaban en Buenos Aires al Ministro del Interior que el Gobierno de la provincia de Salta perseguía el propósito de suprimir el derecho del sufragio y "...substituirlo por la voluntad caprichosa e ilegal del círculo gobernante, compuesto en su inmensa mayoría por los miembros de una sola familia".<sup>11209</sup>

En 1908, cuando el ex-Rochista Pío Uriburu fué a Salta con la candidatura de Robustiano Patrón Costas, consiguió que el grupo gubernista se dividiera

"...con nuestro amigo Ángel Zerda a la cabeza, grupo que se declaró decidido opositor al candidato Dr. Santiago López, Ministro de Gobierno, y consentido sino apoyado por el Gobernador Linares".<sup>11210</sup>

El Gobernador Luis Linares Usandivaras para evitar la división de su partido "...vióse en la necesidad de pedirle a su Ministro que desistiera de sus trabajos y retirara su candidatura".<sup>11211</sup> Logrado su propósito, Linares propuso al Diputado Nacional Dr. Marcos Alsina,<sup>11212</sup> lo cual fue peor que la candidatura de López, pues Alsina "...representaba entregar esta Provincia a la influencia del Presidente y elevar a un hombre de malos antecedentes propios y de oscura familia".<sup>11213</sup>

Para combatir esta situación se formó en Salta bajo el liderazgo del Dr. Robustiano Patrón Costas la Unión Provincial, que según el Diputado Nacional por Santa Fé Rogelio Araya "...congregó en su seno al pueblo todo de la provincia de Salta, y fué entónces que se produjo la minuta de comunicación del Dr. [José Evaristo] Uriburu pidiendo la intervención de la provincia".<sup>11214</sup> Como el Congreso no despachó la solicitud del Poder Ejecutivo, el Dr. Linares, fué electo Gobernador, y el partido Unión Popular, que proclamó la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola, "...no pudo ni siquiera llegar a los comicios".<sup>11215</sup> Para seguir la costumbre, el consagrado Gobernador Dr. Linares, cuando culminó su mandato "...transmitió el poder a un tercer sobrino [Avelino Figueroa Ovejero]".<sup>11216</sup> En realidad, la denuncia de Patrón Costas era producto de un conflicto intra-oligárquico, por cuanto Robustiano Patrón Costas era sobrino carnal de Francisco J. Costas, un Rochista adversario acérrimo del clan Uriburu, y sobrino nieto político de Delfina Ovejero Zerda, mujer de su tío abuelo carnal Miguel Jerónimo Figueroa Güemes, la cual a su vez era tía carnal del Gobernador David Ovejero Zerda. A esta acusación de nepotismo que impulsaba la oposición desde la prensa y el parlamento, la replicaron el propio Dr. Linares desde su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y el senador nacional oficialista Carlos Serrey Dávila. Cuando se trata de la oligarquía, Linares aducía que

"...no se puede tener el mismo criterio cuando se habla de las grandes provincias del litoral, abiertas a todas las corrientes del elemento extranjero, y de las demás provincias que están en contacto fácil e inmediato con ellas, que reciben el aporte de sangre que remueva la propia, que modifica los apellidos y dilata los vínculos de familia".<sup>11217</sup>

Para dichas provincias el criterio podía ser severo; pero no podía serlo igualmente, aducía Linares, para la de Salta

"...provincia mediterránea y lejana, con difíciles medios de comunicación,...donde existen pocas familias pudientes, de arraigo y de tradición, cuyos hijos vienen a educarse en las aulas universitarias u ocupan allí altas posiciones en el comercio y en la industria".<sup>11218</sup>

En esa sociedad, no era extraño, argumentaba Linares, que en "...una familia grande,...vinculada a todas las demás de la provincia, de inmejorable posición pecuniaria", como la familia Ovejero, a la que se había tachado de oligárquica,

"...haya habido dos o tres gobernadores vinculados a la misma, que, sin llevar el mismo apellido, sin ser entre sí parientes íntimos, porque no lo es ninguno, se hayan sucedido en el mando".<sup>11219</sup>

Con referencia al parentesco, Linares sostenía que se exageraba mucho pues

"...se me creía por ejemplo pariente del Señor Zerda...[cuando] no soy su pariente, soy su amigo sincero; quiero y respeto a ese ciudadano venerable, que cuenta en su haber tantos servicios prestados a la provincia; pero no soy su pariente, dentro de las reglas que la ley y la sociedad reconoce, dentro del sexto grado de consanguinidad y del cuarto de afinidad".<sup>11220</sup>

En efecto, dentro de un punto de vista puramente legal no existía parentesco por cuanto la madre de Don Luis Linares Usandivaras era sólo hijastra de la hermana mayor de Don Ángel Zerda, Doña Servanda Zerda y Medina, segunda mujer de su abuelo carnal Don Manuel Usandivaras y Díaz de la Fuente.<sup>11221</sup> También argüía Linares que

"...se me cree pariente del Dr. Ovejero. No, Sr. Presidente; no soy pariente muy inmediato del Dr. Ovejero, de quien fui Ministro y a quien sucedí en el mando: soy pariente en el quinto grado de consanguinidad, y ser pariente en el quinto grado de consanguinidad, dentro de nuestras costumbres sociales, es lo mismo que no serlo: predomina la condición de amigo más que la de pariente".<sup>11222</sup>

Y para remachar la réplica, el Senador Serrey hacía constar que paradójicamente mientras al candidato Dr. Linares y al ex-Gobernador Ovejero los unía un remoto parentesco en el séptimo grado, el candidato de la oposición Dr. Ortiz Viola estaba íntimamente ligado a la familia del ex-Gobernador Ángel Zerda Medina; porque era "...doblemente tío de la esposa de éste, hermano de la madre y primo hermano del padre, e igualmente vinculado a la familia del gobernador actual [Ovejero Zerda]".<sup>11223</sup> Esta realidad Serrey la explicaba aduciendo que en tierra adentro, a diferencia de Buenos Aires,

"...todos somos parientes por las afinidades que se contraen con el matrimonio; raro es el que no tiene parentesco o vínculo de familia; y se ha visto alguna vez, a propósito de otras provincias, que se ha dicho que las autoridades, los empleados y hasta los porteros eran parientes del gobernador".<sup>11224</sup>

Por ello, Serrey argüía, no sin acierto, que para que se pudiera sostener la acusación de nepotismo, debían concurrir dos condiciones inexcusables:

"...que la mayor parte de los empleos de la administración estén a cargo de los parientes del gobernador y que hayan sido llamados, no por su competencia, sino por el hecho de ser tales parientes".<sup>11225</sup>

A propósito de este debate parlamentario el Diario La Prensa, cuyo dueño José Camilo Paz, se hallaba profundamente enemistado con su primo hermano el Gral. Julio A. Roca,<sup>11226</sup> editorializaba el 4 de noviembre de 1906 que

"Las viejas dinastías dueñas de hecho de los destinos de las provincias, se acercan sin duda a su fin, como consecuencia de sus abusos y del robustecimiento de la conciencia cívica del país".<sup>11227</sup>

Así como las dinastías de las provincias de San Luis primero (encarnada en el gobierno de Jerónimo Mendoza Lucero),<sup>11228</sup> y de Tucumán después (encarnada en los gobiernos de José Antonio Olmos y Próspero García), se habían derrumbado; el diario de José C. Paz vaticinaba con injustificado optimismo que "...si en la Casa Rosada hubiera hombres

capaces de cumplir su deber", las dinastías de Mendoza y Salta caerían también.<sup>11229</sup> Era injustificado este optimismo del editorialista del diario La Prensa, por cuanto, como luego veremos, en casi todas las provincias las oligarquías lograron perpetuarse en forma casi vitalicia, aunque por razones no siempre semejantes.

A juzgar por las tesis de Laband y Lentz (1985), a diferencia de aquellos políticos que poseían herederos que llevaban su apellido, los políticos que carecían de herederos debían disipar el valor de su oficio durante su vida, pues la lealtad al apellido en política solo sería de valor en la medida que el apellido sirviera de cedazo efectivo para garantizar la calidad del servicio público producido.<sup>11230</sup>

## **E-VIII El círculo de parientes. El caso de Entre Ríos.**

En Entre Ríos, el gobierno de Salvador Maciá,<sup>11231</sup> amigo del Gobernador Santafesino José Gálvez, se había desacreditado, pues el pueblo

"...vé a su administración de justicia sirviendo los intereses de una familia, los puestos públicos ocupados por miembros de ella, sus rentas invertidas en paseos y giras políticas, y que no se hace el servicio de su deuda externa".<sup>11232</sup>

El gobierno de Maciá (1895-99) se hallaba, a juicio del futuro Diputado Nacional Benito E. Pérez, "...en manos de un tío y tres primos del Gobernador, y del Dr. [Leónidas] Echagüe y sus cuatro sobrinos, que han hecho de él su patrimonio exclusivo".<sup>11233</sup> ¿Cómo es que se toleraba tanta maldad?, se preguntaba Benito Pérez. Se toleraba "...porque al pueblo se le amenaza por la autoridad Nacional, diciéndole que la revolución [de reminiscencias Jordanistas] es un crimen".<sup>11234</sup> Pero acaso se decía Pérez

"...¿no es un crimen la oligarquía en el gobierno, no es un crimen faltar a la Constitución y a las leyes en casos que pueden concretarse por centenares; no es un crimen apoderarse del Poder Ejecutivo, del Legislativo, y del Judicial, para hacer lo que se les antoje a media docena de individuos?"<sup>11235</sup>

No exageraba la prensa, decía Pérez

"...cuando dice que aquí gobierna una familia, es decir, no hay aquí gobierno propiamente dicho, el Registro gubernativo no contiene en los dos años de gobierno de Maciá, un decreto, ni una ley que signifique gobernar, aquí lo que se hace, es cobrar sueldos por los miembros de la familia que manda".<sup>11236</sup>

El calificativo de gobierno nepótico lo había heredado Maciá de Sabá Z. Hernández, aunque cabe aclarar que él no hizo muchos esfuerzos para dejar de merecerlo.<sup>11237</sup> Pero si bien el Dr. Echagüe era pariente cercano de los Zavalla,

"...ni él ni estos [los Zavalla] tenemos parentesco alguno con los Maciá, Parera, Calderón, Carbó, Crespo, Parera Denis, Comaleras, Maglione, y sólo se han contraído algunas afinidades por los matrimonios contraídos, circunstancia que no puede inhabilitar, en manera alguna, a esos hombres prestar servicios a su provincia".<sup>11238</sup>

Pero si recorremos los distintos poderes públicos de la provincia, tenemos según Carlos M. Zavalla, "...que en la Cámara de Justicia no hay ningún pariente ni afin de las familias

enunciadas".<sup>11239</sup> En la Cámara de Senadores había un hermano del Gobernador Maciá, que fue elegido en la administración de Basavilbaso y reelecto en 1897. Ninguno de los otros Senadores provinciales,<sup>11240</sup> era pariente del Gobernador Maciá, ni de sus ministros, ni de ninguna de las familias anotadas.<sup>11241</sup> Lo mismo sucedía para Zavalla, con la Cámara de Diputados y con los Jefes de Policía, pues para que este fuera un gobierno que pudiera llamarse de familia, "...tendría que ser esta [familia] exageradamente larga".<sup>11242</sup> La coalición opositora estaba formada por la facción que se llamó Gigenista,<sup>11243</sup> por una parte de los Radicales, y por algunos de la facción denominada Independiente, de antiguos Febristas,

"...que hasta ayer nomás eran entre sí enemigos en la acepción más verdadera que tiene esta palabra, separados por odios profundos, que no han podido extinguirse por el mero hecho de haberse constituido en coalición".<sup>11244</sup>

En el supuesto de que esta coalición alcanzara el triunfo, este daría origen para Zavalla, "...a otras luchas mucho más encarnizadas entre ellas mismas y luego nuevas coaliciones vendrían a formarse para combatir a la que hubiere resultado beneficiada con la victoria".<sup>11245</sup>

Cuando en el año del siglo (1900) gobernaba el Dr. Leónidas Echagüe Puig,<sup>11246</sup> el Diputado y ex-Gobernador Sabá Z. Hernández,<sup>11247</sup> pedía en la Cámara de Diputados de la Nación que se interviniera al Gobierno de Echagüe, en mérito al argumento del nepotismo, el mismo con que Miguel Cané y Valentín Virasoro habían apoyado la intervención de Catamarca.<sup>11248</sup> Es sabido, decía Hernández, que el Dr. Echagüe

"...no es casado, no lo ha sido antes; no puede, pues, tener hijo empleados en la administración; pero el Dr. Echagüe tiene sobrinos, que han sido sus verdaderos hijos, porque la virtud de este ciudadano es bien conocida: ha querido entrañablemente a sus sobrinos como a hijos verdaderos y esos sobrinos ocupan moral y materialmente los primeros puestos en la administración pública de aquella provincia. El Dr. Echagüe, como tiene sobrinos tiene sobrinas, y esas señoras tienen a sus esposos colocados en las primeras posiciones de la provincia. En esta familia han entrado, por el matrimonio, personas de otras familias; hay cuñados, sobrinos políticos: todos esos son parientes y todos están en la administración de Entre Ríos".<sup>11249</sup>

El Miembro Informante Diputado Nacional Manuel Quintana, manifestaba en mayo de 1900, frente a las acusaciones de Hernández, que tachaban al gobierno de Entre Ríos de gobierno de familia,<sup>11250</sup> que la nómina de 54 parientes del Dr. Echagüe publicada en 1898 por el diario La Provincia, correspondía a un año anterior al de la asunción del mando por Echagüe y suponía parentescos que tampoco existen "...porque inventa parentescos contrarios al derecho civil y canónico".<sup>11251</sup> Según Quintana

"...los consanguíneos y afines de los afines del gobernador son titulados parientes del gobernador, cuando es regla fundamental de la materia,..., que la afinidad no produce afinidad, es decir, que los parientes de mis afines no son parientes míos".<sup>11252</sup>

Si entre los empleados de la administración había parientes del Gobernador Echagüe, si habían sido nombrados por la administración anterior, y si desempeñaban cumplidamente sus deberes, Quintana concluía preguntándose

"...¿puede razonablemente exigirse que el gobernador Echagüe los destituya por el único hecho de ser sus parientes? No, el parentesco, que no debe ser causa del nombramiento, no puede ser causa de la destitución".<sup>11253</sup>

A ello alegaba Hernández, que para negar la existencia de parientes en el gobierno de Echagüe

"...el señor miembro informante [Quintana] quiere aplicarnos en este caso las reglas severas, estrictas, del derecho común, como si se tratara de distribuir derechos entre herederos o acordar preferencias en el grado de parentesco".<sup>11254</sup>

Respecto al hecho de que se había afirmado que en el año o más que llevaba de gobierno no había nombrado más que un empleado pariente suyo, Hernández aclaraba que precisamente ese "...era el único sobrino que no estaba empleado; !no había otro a quien emplear!".<sup>11255</sup> Y ¿todo esto por qué? porque según Hernández "...fue necesario, desde que se formó el círculo de parientes, establecer una base inconvencible en el gobierno, y esta base tenía que ser la unanimidad legislativa".<sup>11256</sup> A nadie se le habría ocurrido que cuando se hablaba de nepotismo se quería decir que todos los puestos públicos estaban ocupados por parientes del gobernador, pues como aquella administración tenía 700 empleados y no había gobernador que pudiese tener ese número de parientes, bastaba la representación de dos legisladores en el Senado Nacional y un ex-senador en el mando de la provincia, para que la composición del gobierno nepótico fuere completa.<sup>11257</sup> Estos últimos eran los

"...que tienen absorbidos todos los derechos que la Constitución consagra en favor del pueblo; ellos son los que eligen, los que gobiernan, ellos son los que hacen justicia, ellos son los que cierran las puertas para que nadie más que ellos intervengan en la administración de la cosa pública".<sup>11258</sup>

Así se explicaba, terminaba de exponer Hernández, que aquel Gobierno "...haya dejado de ser un gobierno republicano, un gobierno representativo, para convertirse en una verdadera oligarquía".<sup>11259</sup> Sin embargo, para el Diputado Nacional Alejandro Carbó Ortiz,<sup>11260</sup> no había tal gobierno de familia.<sup>11261</sup> Para él,

"...la conciencia está hecha sobre esto en Entre Ríos; allí se sabe perfectamente bien que eso no es cierto; pero se engloban unos cuantos nombres de familias tradicionales y antiguas, y se dice: este es pariente de fulano y tiene tal puesto, y este fulano, a su vez, es pariente de tal otro, que tiene tal otro puesto".<sup>11262</sup>

En una ciudad de 20.000 habitantes, o en una provincia de 300.000 habitantes, como la de Entre Ríos, donde una gran proporción eran extranjeros, "...¿qué extraño tiene, se preguntaba Carbó, que se encuentren 54 individuos honorables, unidos por lazos de parentesco, cuando las familias que forman aquellas sociedades están todas ligadas entre sí?".<sup>11263</sup>

Los hijos de políticos solían madurar su incorporación a los cargos públicos más importantes, por cuanto al tenor de las tesis de Laband y Lentz (1985), gozaban de legados en forma de lealtad de marca y no necesitaban, como era el caso de aquellos que no eran hijos de políticos, iniciar la carrera política desde los peldaños más bajos.<sup>11264</sup> En razón de ello se dictaron incompatibilidades personales fundadas en la edad y los antecedentes penales que los legisladores electos pudieran ostentar. En Entre Ríos, en 1881, Justo J.

Caraballo,<sup>11265</sup> aspiraba a ser Diputado, apoyado por el Gral. Juan Ayala y el Jefe Político Comandante Félix Benavídez,<sup>11266</sup> pero fue declarado inhábil "...por falta de edad".<sup>11267</sup> Aparentemente Caraballo insistió, pues el Gobernador Coronel José Francisco Antelo, en carta a Roca, le expresaba que "...elegirlo nuevamente es contrariar esa sanción soberana de la Cámara".<sup>11268</sup> Y respecto a la recomendación de Roca, Antelo tuvo que confesarle que

"...nada puedo hacer en favor de las pretensiones que abriga [Caraballo] de penetrar a todo trance a la Legislatura porque para ello tendría que ponerme en pugna con este cuerpo soberano, y lo que es más falseando por completo la Constitución que exige una edad para ser Diputado que Caravallo no tiene como está probado hasta la evidencia, por mas que él haya pretendido y pretenda demostrar lo contrario, con informaciones falsas, que si algo prueban es la audacia y el cinismo de un joven que entra recién a la vida pública".<sup>11269</sup>

Finalmente, una vez cumplida la edad prescripta constitucionalmente, Caraballo fué electo Diputado Provincial, cayendo luego en aventuras periodísticas y duelísticas.<sup>11270</sup> Por último, Caraballo demostró tener vocación de historiador pues fue designado catedrático de Historia en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay.<sup>11271</sup>

## **E-IX La oposición de Pellegrini. El caso de Santa Fé.**

En Santa Fé, en 1901, y gobernando José Bernardo Iturraspe,<sup>11272</sup> también se suscitó un conflicto que implicó al heredero de un político. En efecto, en ocasión de que se proclamara por la Convención partidaria, el nombre del candidato designado por Iturraspe, que recayó en su sobrino carnal Rodolfo Freyre Iturraspe,<sup>11273</sup> el propio ex-Presidente Carlos Pellegrini denunciaba en la Cámara de Senadores de la Nación que el elegido por Iturraspe era "...uno de sus parientes más allegados, casi su hijo".<sup>11274</sup> Ante el atentado consumado y la violenta reacción que este fraude generó, Pellegrini advertía que

"...la mansedumbre del pueblo de Santa Fé cesó y se escuchó la protesta airada contra tal vejamen, y ese día el despotismo manso se tornó bravo e iracundo, declarando el gobernador sin embozo y sin reparo, que había de deshacer la oposición a balazos; frase que se creyó entonces una simple intemperancia de lenguaje, pero a la que los hechos [el crimen del Jefe Político de Caseros José R. Saurit en Villa Casilda] están dando siniestra verdad".<sup>11275</sup>

Tres años después, en 1904, se produjo una división entre el ex-Gobernador José Bernardo Iturraspe y su sobrino carnal el Gobernador Rodolfo Freyre "...cada día más profunda y sería difícil prever los incidentes a que podrá dar lugar quizá dentro de poco tiempo".<sup>11276</sup>

## **E-X La continuidad nepótica. El caso de Mendoza.**

En Mendoza, el régimen de los gobiernos de familia, subsistió a comienzos del siglo veinte. En efecto, en 1904 el Gobernador electo de Mendoza Carlos Galigniana Segura,<sup>11277</sup> y su Ministro el General Melitón Arroyo,<sup>11278</sup> eran sobrinos de la mujer del Gobernador saliente Elías Villanueva.<sup>11279</sup> Para colmo, en marzo de 1904, la "familia" entronizada en el poder Legislativo, designó Senador Nacional a Elías Villanueva.<sup>11280</sup> Seis años después, en 1910, el Gobernador Emilio Civit (1907-1910) se hizo elegir

Senador Nacional por nueve años y manipuló la relación de paternidad entre el General Rufino Ortega y su hijo homónimo, para enfrentarlos postulando a este último.<sup>11281</sup>

Y más entrado el siglo veinte, el Gobernador José Néstor Lencinas, intervenido en 1919 por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, había dejado como heredero de su legado político a su hijo Carlos Washington Lencinas. En 1924, el Diputado Nacional Pascual Herráiz aseguraba en la Cámara de Diputados que en Mendoza la constitución del Poder Ejecutivo era

"...completamente ilegal, por cuanto el Sr. Carlos Washington Lencinas es heredero directo del gobierno de su señor padre, José Néstor Lencinas, como lo ha demostrado en su fallo en la Suprema Corte, en disidencia contra el oficialismo de Mendoza, el Dr. Joaquín Sayanca".<sup>11282</sup>

También aseguraba el Diputado Nacional Pascual Herráiz que en Mendoza no existía la división de poderes que establece la Constitución Nacional y que el único poder que existía era "...la voluntad del Sr. Gobernador".<sup>11283</sup> Dicha voluntad había repartido los puestos más importantes de la administración pública entre todos sus parientes y allegados, entre los cuales

"...el hermano del Gobernador que se sienta en este Honorable cuerpo, Dr. José Hipólito Lencinas; el [otro] hermano del gobernador, diputado provincial y presidente de la Cámara, Dr. Rafael Lencinas; dos primos hermanos, también diputados provinciales, Señores Echove Peackoc; y su primo hermano José Manuel Taboada jefe de Policía de Mendoza; otro de los primos Sr. Videla Bougat, gerente del Banco de la Provincia.<sup>11284</sup>

Por otro lado, también los ministros tenían hermanos dentro de la Legislatura Mendocina: "...es el caso de Leopoldo Suárez, ministro de Industrias, que tiene a su hermano César diputado provincial, y el Dr. Alberto Sáa, primo hermano del ministro de gobierno, e intendente municipal".<sup>11285</sup> Otros cinco años después, en 1929, y como corolario de esta política, el Diputado Nacional Edgardo J. Míguez denunciaba en el Parlamento Nacional que en Mendoza

"...existe una familia privilegiada y preponderante...uno de sus miembros [Carlos Washington Lencinas] pasó de diputado nacional a gobernador, de gobernador a presidente de la Legislatura, de presidente de la Legislatura a senador nacional, cargo que renunció por maniobra y en el que volvió a afianzarse sin que su diploma se haya tratado hasta el día de hoy. Otro [José Hipólito Lencinas] acaba de terminar su mandato de diputado nacional y fue vencido en la elección por su compañero de lista que ocupa actualmente su lugar. Y el tercero [Rafael Néstor Lencinas], legislador provincial, presidente de la Cámara de Diputados, socio de la firma Sevilla y Compañía y electo Diputado Nacional, acaba de obtener el más rotundo rechazo de su diploma, como justa sanción a las demasías cometidas en su provincia".<sup>11286</sup>

Es necesario compenetrarse, sostenía el Diputado Míguez, que

"...esa familia es todo y nada se mueve sin su anuencia, a tal punto que hace rechazar o retirar propuestas de magistrados, cuando estas no le satisfacen plenamente; y que llega a tanto su poder que, según se afirma con caracteres

de veracidad, obtiene fallos judiciales favorables contra derecho, y hace subir o bajar los honorarios de los procuradores, peritos y abogados a voluntad".<sup>11287</sup>

Debemos entonces concluir, sobre la base de los conflictos de nepotismo suscitados en las gobernaciones de Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fé y Entre Ríos aquí relatados, y los numerosos parentescos entre los miembros de las familias de la elite política y entre los Gobernadores, Diputados, Senadores, Jueces, Generales, Ministros, Gerentes de Bancos nacionales y provinciales, Administradores de Correos y Telégrafos, Rectores de Colegios Nacionales y Administradores de Ferrocarriles, que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, que el sistema aristocrático o monárquico fue entre nosotros una patética realidad; y que las estructuras oligárquicas locales vigentes en los partidos conservadores fueron más fuertes que cambio político, división de poderes o forma republicana alguna, incluidas la llamada Organización Nacional, y la propia Ley Sáenz Peña; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, lo que ocurrió fue que las oligarquías acudieron a la intervención militar, en una escala nacional. La inmigración masiva, la educación obligatoria (Ley Láinez) y la Reforma Universitaria, si bien lograron acelerar la movilidad social, ampliar la base de reclutamiento de la elite, y con ella la circulación de las elites políticas, no habría transformando a la elite política conservadora (denominada oligarquía argentina), producto de una mecánica sumatoria de oligarquías provinciales, en una burguesía nacional independiente.

## **Sección V-B Favoritismos en los espacios del poder**

### **Capítulo V-B-6.- Traslado y revocación de jueces como mecanismos facciosos**

#### **Índice**

- F-I El Fuero Federal en el siglo XIX de la Argentina.\*
- F-II Tradición historiográfica en materia de inestabilidad judicial
- F-III Diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes).
- F-IV Invasiones de un poder en otro.
- F-V Favoritismo y corrupción en la Justicia.
- F-VI Designación, traslado y revocación de jueces.
- F-VII Cargos políticos detentados por los jueces.
- F-VIII Carrera judicial propiamente dicha.
- F-IX.- Consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y promoción.

#### **F-I Introducción. El fuero federal en el siglo XIX de la Argentina.\***

Cabe preguntarse en materia judicial si la administración de justicia contó siempre en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario pueden hallarse en su desempeño histórico fuertes altibajos, desajustes o involuciones; y si

la Justicia Federal fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de un Antiguo Régimen, aún inconcluso, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>11288</sup> La aparición de la república moderna hizo necesario entonces contemplar la influencia de la administración de justicia en otras instituciones, tales como las redacciones del periodismo político, las gerencias de los bancos, las comandancias de las guarniciones militares, los capítulos catedralicios, las inspecciones de las estaciones postales y telegráficas y las bancas parlamentarias, así como la independencia de las mismas del poder ejecutivo del Estado. Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades judiciales.

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los fallos judiciales, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron del comportamiento de los jueces, y en particular de los jueces federales.<sup>11289</sup> En ese sentido en este trabajo analizamos la diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes), las invasiones de un poder en otro, el favoritismo, la corrupción y la judicialización de la política, la designación, traslado y revocación de los jueces, la carrera judicial propiamente dicha, los cursus honorum políticos acumulados por los jueces, y las consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y promoción.

Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,<sup>11290</sup> del que nos habla Carmagnani (1988); instrumentando numerosos textos de época hallados en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en las correspondencias presidenciales de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y en la provincial del Dr. Dardo Rocha, depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y el método estadístico-genealógico, instrumentando para ello un listado de Jueces Federales y Provinciales, con un Apéndice que tabula sus conexiones en materia de parentescos sanguíneos y políticos.

La lenta gestación de la esfera pública en el mundo moderno fue dando lugar a la constitución de lo que se ha dado en llamar la Magistratura. El mecanismo inicial de la jurisdicción absolutista (el capitular), legado histórico de la colonización Habsburga, que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducía el número de los jueces a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba la administración de justicia en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas. La aparición de la magistratura en la panoplia de la república moderna hizo necesario también contemplar sus relaciones con la burocracia civil, eclesiástica y militar; y su propia independencia de los otros poderes del Estado. Para la consecución de una república democrática, la división de poderes y la independencia de la justicia, eran consideradas en aquél entonces, a juicio de Zimmermann (1994), como instrumentos profundos y fundamentales. En ese sentido, la independencia institucional de un juez, el respeto de la jurisdicción natural de los jueces,<sup>11291</sup> y las incompatibilidades judiciales constituían un valor sagrado.<sup>11292</sup>

## **F-II Tradición historiográfica en materia de inestabilidad judicial**

A diferencia de la burocracia educativa, el caso de la burocracia judicial no siempre ha merecido el interés correspondiente.<sup>11293</sup> Mientras que para la tesis liberal-utilitarista, propuesta por Jeremy Bentham, era conveniente hacer compatibles las funciones legislativas con las judiciales;<sup>11294</sup> para la tesis liberal-positivista,<sup>11295</sup> las incompatibilidades entre los cargos judiciales y legislativos constituían la piedra angular de la división de poderes.<sup>11296</sup>

Más luego, para el Marxismo, revisado por Gramsci, el éxito del orden republicano no habría residido en la presencia de condiciones materiales, tales como el desarrollo de las fuerzas productivas, sino en el despliegue de una efectiva estrategia de hegemonía cultural impulsada por la llamada intelectualidad orgánica (periodistas, rectores de colegios y universidades, gerentes de bancos, inspectores de correos), entre la cual se encontraba sin duda un sector de la magistratura y del foro, que aunara a todas las clases populares de la ciudad y del campo detrás de un bloque revolucionario que derrotara a la llamada intelectualidad tradicional (el clero), rompiera las casamatas de la modernidad colonial-absolutista y abriera el camino hacia la democracia.

Asimismo, para el estructuralismo, mientras Flory (1975, 1977) sostuvo que la magistratura se convirtió en un agente político dependiente de la elite terrateniente, con las cuales se consolidaban las situaciones estatales; Schwartz (1973) y Barman y Barman (1976, 1977), por el contrario, sostuvieron que la magistratura consistió en una elite altamente profesionalizada y eficiente que se promovía gradualmente y por estricto orden de antigüedad. Últimamente, una corriente pos-moderna, representada por Zimmermann (1994), Gargarella (1995) y Smulovitz (1995, 1996) ha vuelto a incursionar en la llamada independencia de los jueces y de la justicia respecto de la política y de los demás poderes del estado. Pero lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre la administración de justicia, y la naturaleza de los regímenes electorales, educativos y comunicacionales.<sup>11297</sup>

### **F-III La diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes).**

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>11298</sup> El que los miembros del Tribunal de Justicia, poder supuestamente independiente del estado, ocuparen cargos políticos como el de Diputados, Senadores, Gobernadores o Jefes de Comités Electorales fue estigmatizado por políticos como Aristóbulo del Valle y numerosos juristas.<sup>11299</sup> Cuando en 1862 los Senadores Salvador María del Carril y Francisco Delgado fueron nombrados Ministros de la Corte Suprema, ésta estableció el principio de

"...que la aceptación por parte de un senador, del cargo de miembro de la Corte Suprema o de un Juzgado Federal, aún sin previa renuncia, importa el cese de su destino de senador".<sup>11300</sup>

También el Senador Correntino Pedro Ferré planteó en la década de 1860 la incompatibilidad entre las funciones judiciales y legislativas.<sup>11301</sup> Sin embargo, en Salta, la familia Uriburu y su círculo, a juicio de Francisco J. Ortiz, se preparaba en 1882 a candidatear para Gobernador al Juez Federal Pedro Nolasco Arias,<sup>11302</sup> "...ese nuevo caballo griego que Vd. nos ha mandado disfrazado de Juez".<sup>11303</sup> Su venida a Salta, a juicio

de M. Zorreguieta, fue "...de gran esperanza, era ya el candidato para futuro Gobernador de la Provincia".<sup>11304</sup> Y en Entre Ríos, en 1882, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia figuraba "...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este Superior Tribunal formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los Jueces de primera instancia, que en Entre Ríos se llaman de Alzada, formaban parte de los Comités electorales".<sup>11305</sup>

Pero la división y superposición de poderes y las incompatibilidades judiciales no alcanzaban la misma intensidad en las diferentes provincias de la Argentina moderna. La Constitución de Mendoza en el capítulo referente a las atribuciones del Poder Legislativo dice en su art.2, inc.1: "Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus miembros".<sup>11306</sup> Atribución explícita que constituía a la Legislatura en juez electoral inapelable de las elecciones provinciales. Con las mismas palabras como si se hubiesen copiado las unas a las otras, se encuentra ese artículo en las Constituciones de las siguientes provincias: La Rioja, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fé, San Juan, y Corrientes.<sup>11307</sup> La Constitución de Córdoba difiere de las anteriores en estos términos "La Asamblea será juez en la comprobación de los poderes de sus Diputados".<sup>11308</sup> La de Santiago del Estero atribuye a una Comisión de la Sala en receso esta facultad "Recibir los Diputados electos haciendo el escrutinio de las actas de la elección".<sup>11309</sup> Estas Constituciones dan a la Legislatura facultades más amplias, invasoras del Poder Judicial, por que expresamente le confiere la facultad para resolver sobre la validez o nulidad de los títulos de sus miembros, pero aún esta facultad tan amplia como peligrosa supone la salvación de las mayorías, para no alterar el orden republicano.<sup>11310</sup> A propósito de la superposición de las funciones legislativas y judiciales, desde Tucumán, José Posse llegó a recomendarle a Roca que leyera un artículo periodístico suyo,<sup>11311</sup> en donde caracterizaba a dicha superposición como "...un Poder Público metido o embutido dentro de otro Poder".<sup>11312</sup>

Pero el articulado de las nuevas Constituciones Provinciales, que incluían incompatibilidades, impidiendo ser legisladores a los empleados de los Poderes Ejecutivo y Judicial, demandaban una plétora de recursos humanos calificados y partidos políticos mucho más numerosos que pudieran dar abasto a la creciente exigencia de mayor cantidad de cuadros administrativos y judiciales.<sup>11313</sup> La costumbre de "...renovar íntegramente el personal de las oficinas a cada cambio de la política", es decir violar la independencia y autonomía del poder administrador, en el caso de Santiago del Estero, la atribuía José Nicolás Matienzo a "...los malos hábitos dejados por el gobierno personal de los Taboada".<sup>11314</sup> Ese es el motivo que "...no ha permitido la formación de prácticas administrativas regulares", y lo que hacía que los Gobernadores y los Ministros tengan que intervenir "...hasta en los más insignificantes detalles".<sup>11315</sup> Tienen que ser, según la frase de Buckle, "...arquitectos y albañiles a la vez".<sup>11316</sup> Por ese mismo motivo, el recientemente designado Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto le comunicaba al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman "...hoy no trato de echar a toda la Administración de Justicia".<sup>11317</sup>

Por el contrario, en ciertas provincias la interferencia legal de unos poderes en otros era jurídicamente imposible. En Tucumán, la separación entre los Poderes Legislativo y Judicial era casi absoluta. El ex-Senador Nacional José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco", observaba que la Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha "...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo objeto a los Diputados Nacionales".<sup>11318</sup> La razón que

tuvieron los constituyentes para no darle a la Legislatura atribuciones judiciales se explicaba y se justificaba, a juicio de Posse,

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus miembros".<sup>11319</sup>

Preferible debía ser, según Posse,

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad de sus actos".<sup>11320</sup>

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la Sala era, para Posse

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".<sup>11321</sup>

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía sosteniendo en la prensa:

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, porque la elección es un acto indivisible".<sup>11322</sup>

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y del decoro, que el Gobierno reconociera una Legislatura con Diputados que no hubieren sido elegidos por los pueblos de los Departamentos.<sup>11323</sup> Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,

"...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación".<sup>11324</sup>

Las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de consagrado el proceso de Organización Nacional. El que los jueces federales, detentadores de un poder independiente del estado, ocuparen cargos ejecutivos como el de Gobernadores, fué puesto en tela de juicio; y el hecho que conjuntamente con los Presidentes de los Tribunales de Justicia integraren las Juntas Electorales era motivo de permanentes conflictos.

#### **F-IV Las invasiones de un poder en otro.**

Asimismo, el que los Poderes Ejecutivos o Legislativos provinciales intervinieran o invadieran la jurisdicción de los Poderes Judiciales comprometía o alteraba el orden republicano. Jujuy, en la tarea de reponer sus autoridades, fue intervenida por decreto del Gobierno Nacional, el 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, en el cual se desarrollaba una peculiar teoría que garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial. A comienzos del año siguiente, el 6 de enero de 1880, el Interventor Uladislao Frías, que a la sazón era Ministro de la Corte Suprema, puso en práctica, según Absalón Rojas, "...las originales y pérfidas teorías de Sarmiento", al reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones sólo para sustituir a aquellos cuyo mandato había fenecido.<sup>11325</sup> En Catamarca, el Gral. Antonino Taboada juzgó conveniente, después de la batalla del Pozo de Vargas, nombrar como Fiscal a su amigo el Dr. Remigio Carol, "...a fin de que se aperciba una vez mas de que la cuña para que sea buena, es necesario que sea del mismo palo".<sup>11326</sup> Quince años más tarde, a los Sres. Molinas, dueños de la Casa Comercial más importante de Catamarca, les interesaba "...tener los Jueces de su parte y como desde años los tienen, han irritado sobremanera el espíritu público y lo tienen decididamente en contra".<sup>11327</sup> Y en Tucumán, la Sala de Representantes aprobó en 1879 los diplomas de Diputados Provinciales, entresacando entre los candidatos electos por las minorías en perjuicio de los candidatos electos por las mayorías.<sup>11328</sup> Esta deleznable práctica se hizo, a juicio de Posse, bajo el auspicio de la doctrina Sarmientina, inaugurada en Jujuy, de que

"...las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención Francesa, la absorción de todos los Poderes Públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno; la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo".<sup>11329</sup>

Y también en Salta, el Poder Legislativo contaba en 1896 con facultades cuasi-avocatorias o judiciales. La publicación de un artículo en *El Cívico*, en el cual se empleaba el epíteto de "alcahuetes" con relación a trece diputados,<sup>11330</sup> provocó el enojo de la Legislatura, la cual ordenó el arresto de los periodistas autores del agravio, violando el antiguo precepto que establece que nadie puede ser juez en causa propia.<sup>11331</sup> El Jefe de Policía cumplió la orden transmitida. Tras once días de arresto los autores del agravio obtuvieron un habeas corpus del Juez de Comercio, que el Jefe de Policía hizo efectivo. Irritada la camarilla de los trece diputados por la libertad de los periodistas arrestados, e instigada por el ex-Diputado Nacional Ángel M. Ovejero y los editoriales de *La Razón* (Salta),

"...le pareció llegada la oportunidad de desarrollar todo su plan de campaña contra el Sr. [Antonino] Díaz, contra su Ministerio [de Hacienda e interinamente de Gobierno], y sancionó el famoso decreto 'que suspendía la consideración [en la Legislatura] de todos los asuntos que pendían de su sanción'".<sup>11332</sup>

Donde más se observaban las invasiones de un poder en otro y las arbitrariedades era en la Juntas Electorales, compuestas por los Jueces Federales y los Presidentes de la Legislatura y el Tribunal de Justicia, en oportunidad de elecciones nacionales; y en la Justicia de Paz responsable de administrar la justicia electoral provincial.<sup>11333</sup> Eran en esta última donde más recaían los reclamos de prescindibilidad electoral.<sup>11334</sup> El deber del Juez Federal consistía, a juicio del Diputado Nacional Filemón Posse, en informar si eran ciertos los hechos fraudulentos "...en que las protestas se fundan".<sup>11335</sup> Pero era la Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los hechos y de la prueba que sobre esos hechos se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no la

provincia tal o cual en condiciones electorales".<sup>11336</sup> En un comienzo, las mesas escrutadoras eran compuestas por aclamación. En Salta, en 1854, Manuel Puch designó la mesa escrutadora

"...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y poncho calado, gritando por Don Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria afirmativamente".<sup>11337</sup>

De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo diez personas, permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".<sup>11338</sup> Pero más luego, los Jueces de Paz adquirieron una importancia más grande que los mismos miembros de los Tribunales de Justicia, pues a juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, eran en 1882 "...con arreglo a nuestro sistema electoral, la llave de la elección".<sup>11339</sup>

Treinta años después los métodos fraudulentos se sofisticaron. En Santiago del Estero, como el Juez de Primera Instancia en lo Civil,<sup>11340</sup> que presidía la Mesa Electoral de la Capital, era un joven muy celoso de su independencia, al Gobernador Pedro C. Gallo no se le ocurrió mejor idea que reformar la Ley Electoral, convocando a sesiones extraordinarias, para que la Mesa Electoral fuera presidida por un Juez de Paz que él pudiera manipular.<sup>11341</sup> En Catamarca, el Gobernador José S. Daza le denunciaba a Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los Departamentos,...a ver si corrompen a los conjuces por medio del dinero".<sup>11342</sup> Para ello, según Daza, "...tendrán que fundir el Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus guaridas, no cuentan con un sólo hombre en las mesas [electorales]".<sup>11343</sup> En Jujuy, en Febrero de 1886, el Gobernador J. M. Álvarez Prado le informaba a Roca que a consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y expuesta a sucumbir por falta de armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial".<sup>11344</sup> Y en La Rioja, el Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 orden de prisión contra el Vice-Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político rochista Guillermo San Román "...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional".<sup>11345</sup> El suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a Catalán el resultado de una insaculación fraudulenta, por haber sido hecha, antes de vencerse el término de tachas, el 30 de diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la Provincia "...que por las distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al Juzgado Federal el 9 del corriente".<sup>11346</sup> Por ese motivo, la Junta Electoral, que estaba compuesta por el Juez Federal y los Presidentes de la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, se había reunido el 10 de enero de 1886 en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjuces. Pero el Ministro de Gobierno Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, desconoció por decreto a la Junta Electoral y dió orden "...para que sean perseguidos y reducidos a prisión todos los Conjuces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su mandato".<sup>11347</sup> Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales sorteados. En realidad aquel fraude fue la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que Catalán había hecho de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San Román, la Corte de Justicia provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que este optó por fugarse a Córdoba.<sup>11348</sup> Días más tarde, el Tribunal fue intervenido por el Poder Ejecutivo, recayendo la intervención en el Camarista Dr. Lorenzo

J. Torres,<sup>11349</sup> y la Junta Escrutadora modificada para otorgarle mayoría al situacionismo.<sup>11350</sup> Por el contrario, en Catamarca, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino, le confesaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, a la sazón oficialista, pues

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".<sup>11351</sup>

Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que, como consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas receptoras de votos".<sup>11352</sup>

Estas arbitrarias invasiones de un poder en otro no eran unánimes en todas las provincias. Cuando en Santiago del Estero el Gobernador Pedro C. Gallo, cuya nominación como Gobernador se la debía a los hermanos Jaime y Pedro Vieyra, dirigió circulares a los Comandantes y Jueces de Paz, bajo su firma, diciéndoles

"...que habiendo sido acordada una lista en una reunión numerosa de amigos, y les pide le presten todo su concurso y elementos para hacerla triunfar",<sup>11353</sup>

numerosos Jueces de Paz y algunos Comandantes, probablemente influidos por el Comandante Octavio Olascoaga, "...han devuelto la circular considerándola vejatoria y dándole una lección de moralidad al Sr. Gobernador".<sup>11354</sup> En otros casos prevalecían ciertos pruritos. Cuando en San Juan una agrupación del Club del Pueblo hizo una manifestación de adhesión a la política presidencial de Roca y de repudio a la política provincial de Anacleto Gil (h), el Juez de Primera Instancia Segundo Benavídez justificaba --consciente de las incompatibilidades judiciales-- la no suscripción de ese documento porque su cargo lo privaba de ello, pero les dijo a sus amigos "...que renunciaría el empleo si fuese necesario porque no era digno ni decoroso, que siendo empleado le hiciera la guerra desde el puesto que desempeñaba".<sup>11355</sup>

Las invasiones o superposiciones de un poder jurisdiccional en otro se extendieron a las relaciones del Poder Civil con la Iglesia.<sup>11356</sup> En San Juan, en 1857, el Gobernador Francisco Domingo Díaz y su Ministro José Antonio Durán habían detenido y procesado criminalmente al Provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona.<sup>11357</sup> Pero un decreto del Vice-Presidente Salvador María del Carril y del Ministro Campillo mandó reponer al funcionario eclesiástico.<sup>11358</sup> Y en Córdoba, la publicación de artículos anti-clericales en el periódico La Carcajada, provocó el enojo de la Iglesia, en la persona de su Vicario Dr. Jerónimo Clara, quien dictó una Pastoral, el 25-IV-1884, prohibiendo a los feligreses la lectura de dicho semanario.<sup>11359</sup> A propósito de esta Pastoral, acusada por el gobierno de Roca como subversiva del orden social y de la autoridad nacional, el Poder Ejecutivo ordenó el enjuiciamiento de dicho Vicario Capítular por el Juez Federal, luego de haberlo despedido por decreto de su autoridad canónica.

La invasión de la magistratura judicial también se manifestó sobre la Milicia, alimentándose con las excepciones al servicio militar y las permanentes rebeliones en las

provincias. Con posterioridad a Caseros y en pleno proceso de la llamada Organización Nacional, el poder de la magistratura federal suplantó a la Guardia Nacional o al Ejército de Línea, llamados a intervenir contra los desafueros de las magistraturas provinciales o como los encargados del enganche para la remonta del ejército nacional.<sup>11360</sup> En la década del 70, en una muy ilustrativa misiva enviada desde Mendoza al General Roca, el Jurista Manuel A. Sáez,<sup>11361</sup> expresaba que si bien el gobierno provincial ya no contaba con elementos de la nación (Guardia Nacional o Ejércitos de Línea) para oprimir a sus opositores, "...manejan a su antojo los Tribunales en donde han colocado hombres que son verdaderos instrumentos".<sup>11362</sup> En otras palabras,

"...el Ejecutivo ha sustituido en mucha parte la fuerza de que antes disponía con la composición de los Tribunales, que tiene hoy tan subyugados como antes no se ha visto en la provincia".<sup>11363</sup>

Con referencia a las levas practicadas por los Ejércitos de Línea, en Mendoza, el Gobernador Joaquín Villanueva le relataba a Roca, refiriéndose a los abogados y procuradores que defendían a los destinados, que fuera de los que han sentenciado los Tribunales hay treinta hombres mas destinados

"...y tengo nueve presentaciones y treinta empeños para que no sean incorporados a las Compañías. Hasta hoy las solicitudes son hechas ante el Gobierno pero mañana no faltará un Chileno González que patrocine a las madres, mujeres o hermanas de los destinados y vayan ante el Juez Federal a fastidiarlo como a mí".<sup>11364</sup>

Y en San Luis, el Gobernador Toribio Mendoza le informaba a Roca que el Juez Federal Donaciano del Campillo, procedente de Córdoba, había tomado "...su deseo de paralizar y entorpecer la acción de gobierno [el reclutamiento]", con tal furor que su Juzgado estaba

"...habilitado de día y de noche y había nombrado dos Fiscales ad hoc que eran [Justo] Daract y [C.] Jofré [ambos Puntanos] para que recibieran las solicitudes que se presentasen por los que formaban parte de los cuerpos movilizados".<sup>11365</sup>

No obstante ello, Don Toribio llevó su prudencia hasta el extremo de

"...hacer respetar por los Jefes de los Cuerpos, varias ordenes que directamente les pasaba el Juez, mandándoles dieran de baja algunos individuos por haberlos exceptuado".<sup>11366</sup>

Más luego, cuando Don Toribio se apercibió de la parcialidad manifiesta del Juez Campillo, "...dí orden de que no fueran respetadas sus ordenes sin antes consultar al Gobierno".<sup>11367</sup>

Las crónicas rebeliones en las provincias dieron a los Jueces Federales materia prima para sus dictámenes. En Jujuy, la intervención del Juez Federal Dr. Federico Ibarguren, en 1877, obedeció a las desavenencias internas existentes en el gobierno de Cátulo Aparicio y en el seno de la facción Barcenista,<sup>11368</sup> ampliamente relatados en el trabajo publicado por Corbacho y otros (1977). Y dos años después, el 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, Jujuy volvió a ser intervenida recayendo la misma en el Ministro de la Suprema Corte Uladislao Frías Gramajo, para quien la tarea no fue fácil pues, según José María Astigueta "...ha ido a

medias a interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro Escalígero".<sup>11369</sup> El ejemplo hallaba semejanza pues

"...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar en la moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el misterio los planes más audaces en satisfacción de los sentimientos más cobardes".<sup>11370</sup>

En Corrientes, con motivo de la Intervención del Dr. Victorino de la Plaza, y de la orden para que fueran repuestas las autoridades de campaña desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo ver al Juez Federal José Benjamín Romero,<sup>11371</sup> en carta a Dardo Rocha, que donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz, el Interventor se ha atribuido "...la facultad de crearlos".<sup>11372</sup> También cuidó el Interventor en Corrientes de

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".<sup>11373</sup>

Y en el caso de San Juan, el Gobernador Anacleto Gil declaró "...cesantes el Jurado actual y nombrando otro a su amañó y sin juicio político y consiguiente destitución de los principales miembros del Poder Judicial, que no son partidarios del Gobernador".<sup>11374</sup> Al año siguiente, en Febrero de 1884, con la muerte del Gobernador Agustín Gómez, a juzgar por el Juez de la causa Dr. Numa Sánchez Benavídez, la persecución de los asesinos no terminó con el principal sospechoso, el ex-Inspector de Irrigación y Agricultura de San Juan Napoleón Burgoa, pues

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los mandatarios cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra algunas personas que eran inocentes".<sup>11375</sup>

Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen "...convertir en instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Juez Numa Sánchez Benavídez adoptó

"...el temperamento de mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento estricto de mi deber sin servir ni al gobierno ni a los revolucionarios sino a la justicia tal cual yo la entendí".<sup>11376</sup>

## **F-V El favoritismo y la corrupción en la Justicia.**

La Justicia Federal, no obstante su función de control y revisión constitucional,<sup>11377</sup> y las Justicias Provinciales, fueron siempre instrumentos extremadamente idóneos para el favoritismo y la discriminación política. Ya en la primera mitad del siglo XIX, con motivo del enfrentamiento de Facundo Quiroga con el ex-Gobernador Nicolás Dávila, el Ministro José Inocencio Moreno le escribía a Facundo en abril de 1824

"...Inmediatamente procedí yo: en este Departamento a la deposición del Juez de Minas Don Domingo Dávila y del [Juez] Pedáneo Manuel Gordillo por las relaciones de parentesco y demás que tienen estos con los Dávilas".<sup>11378</sup>

Aún luego de Caseros, el favoritismo y la corrupción de las magistraturas locales, es decir el llamado círculo vicioso, alcanzaba intereses privados estrechamente ligados con intereses políticos. En Mendoza, Lauro Galigniana Villanueva le advertía al Gral. Julio A. Roca, refiriéndose a la quiebra de la Banca González,<sup>11379</sup> que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".<sup>11380</sup> El diario El Constitucional proponía en 1879 como indispensable, "...buscar letrados completamente ajenos a todo vínculo personal o de familia; contratar jueces y abogados de otra provincia".<sup>11381</sup> La corrupción en las esferas judiciales mendocinas la confirmaba tres años más tarde, en 1882, el propio Gobernador José Miguel Segura, quien le informaba a Roca que "...el estado del Superior Tribunal no podía ser dado peor la presencia con él de un elemento corrompido que le desprestigiaba dentro y fuera de la provincia".<sup>11382</sup> Y otros tres años más tarde, el ex-Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Isaac Chavarría le informaba a Roca que para que el Dr. Juan Eugenio Serú pueda confirmar la propiedad de las tierras de Malargüe, que disputaba al ex-Gobernador Rufino Ortega, al Camarista Manuel Videla lo

"...sacarán ahora...para hacerlo Diputado al Congreso y nombrar en su reemplazo al redactor de Los Andes, Adolfo Calle, enemigo personal y capital de Ortega y así seguirán".<sup>11383</sup>

En Santiago del Estero, en 1885, el Gobernador Absalón Rojas quiere, --en la Administración de Justicia-- deshacerse "...de la 'inmundicia' que tuvo que manejar por necesidad".<sup>11384</sup> Las desmedidas pretensiones manifestadas por los hermanos Benjamín y Dámaso Jiménez, Ministros del Superior Tribunal de Justicia, le ofrecieron a Rojas la excusa para "...arrojarlos a la calle porque no habían hecho sino desacreditarlo a él y a la situación de la provincia".<sup>11385</sup> Y en Entre Ríos, mientras el Juez Federal Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación Nacional se comprometía a fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra de los intereses económicos del Jefe Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L. de Elía;<sup>11386</sup> pero cuando su candidatura fue reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el Ministro de Hacienda Juan Antonio Mantero,<sup>11387</sup> él mismo vecino de Concepción del Uruguay, le informaba reservadamente a su condiscípulo, el Gral. Roca, que sería fácil que

"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene vínculo que lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".<sup>11388</sup>

Si bien la actividad política ostensible le estaba vedada a los Jueces Federales, ello no era óbice para que informal u oficiosamente los Jueces intervinieran en política. En ese sentido nada más ilustrativo que el tenor de cierta correspondencia reservada mantenida por los Jueces con notorios políticos. En Santa Fé, en oportunidad de debatirse la sucesión del Irigoyenista Gobernador Manuel María Zavalla,<sup>11389</sup> el Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que tiene el mayor número de simpatías era el actual Ministro José Gálvez, "...pues no solo cuenta con la buena voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de muchos de los que han sido siempre opositores a Iriondo".<sup>11390</sup> Y para hacer ver que en Santa Fé, la figura de Juárez Celman valía más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez Federal Gualberto Escalera y Zuviría sugirió a J. Celman que en la candidatura a Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, se eliminara a Bernardo de Irigoyen (h).<sup>11391</sup>

## **F-VI La designación, traslado y revocación de los jueces.**

Pero la designación de los Jueces Federales requería del acuerdo del Senado de la Nación y la nominación de los Jueces Provinciales de las necesarias negociaciones en los acuerdos de los Senados provinciales.<sup>11392</sup> Es sabido que con la denominada Organización Nacional el número de magistrados y abogados entre los miembros de la elite, particularmente en las Legislaturas y el Congreso Nacional, fué incrementándose progresivamente en perjuicio de militares y curas. Sin embargo, esta paulatina incorporación no fué practicada sin que se dieran permanentes conflictos. Una reforma de la administración de justicia que contemplara la elegibilidad popular de los jueces fue un reclamo desoído.<sup>11393</sup> En Catamarca, el Senado negaba en 1885 el acuerdo para que fueran designados Camaristas los Dres. Salvador de la Colina y Marcos Figueroa. El rechazo de Colina trajo, según el ex-Ministro de Gobierno Lúndor B. Sotomayor, el rechazo de Figueroa. El primero era la manifestación "...de los rencores aún latentes que ha dejado su dura tenacidad anterior", y el de Figueroa "...una revancha del otro rechazo que a él se atribuía".<sup>11394</sup> La explicación de este entuerto la da con una claridad meridiana el propio Gobernador José S. Daza, quien en carta a Roca le manifiesta que

"...habiendo arreglado con los amigos nuestros, que en la votación para la aceptación de estos jueces, en caso se manifestara opositor el Dr. Figueroa con su canalla clerical a Colina, que votasen también en contra de Figueroa y fue lo que sucedió".<sup>11395</sup>

En los Acuerdos donde se designaban, trasladaban y promovían los miembros de las magistraturas nacional y provinciales intervenían no sólo consideraciones de índole puramente profesional sino también intereses políticos y clientelísticos. En Tucumán, el Gobernador Lucas A. Córdoba le aseguraba infructuosamente a Roca que sería muy grave discernir el cargo de Juez Federal al Dr. Federico Helguera,<sup>11396</sup> "...que es enemigo radical del partido nacional, particularmente enemigo político tuyo y enemigo a la vez de la situación", en lugar del Dr. Napoleón Vera, "...que es tu recomendado y nuestro común amigo político y personal".<sup>11397</sup> En San Juan, el Juez Severo Igarzábal, hermano del Senador Nacional Rafael Igarzábal, pagó en 1883 su vocación periodística, por su agresiva conducta como redactor del periódico La Unión,<sup>11398</sup> con la destitución del seno del Poder Judicial.<sup>11399</sup> En Santiago del Estero, a raíz de la renuncia del Dr. Pedro Novoa,<sup>11400</sup> fue candidateado como Juez Federal el Dr. Gabriel Larsen del Castaño. Pero esta candidatura fue frustrada con su arresto, bajo la aparente y falsa acusación de conspirar contra el orden constituido.<sup>11401</sup> Y en La Rioja, a fines de siglo, en marzo de 1898, la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado provincial no obedecía a otro propósito, según Catalán,

"...sino a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de [Francisco Vicente] Bustos, renunciar éste el Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino [Antonio P.] García".<sup>11402</sup>

Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar interminable".<sup>11403</sup> Finalmente, dicha maniobra provocó el 23 de abril de 1898 un levantamiento popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista.

## **F-VII Los cargos políticos detentados por los jueces.**

La Lista J nos revela el dossier burocrático de innumerables jueces, camaristas, miembros integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Defensores de Pobres, Procuradores Fiscales y Vocales de las Cámaras Federales, conjuntamente con los cargos políticos detentados antes y con posterioridad al ejercicio de la magistratura. De dicha Lista, resulta que de 73 jueces federales, sólo 25 o el 18%, ocuparon cargos políticos con anterioridad a su designación en el foro, y 48 o casi el 50%, dejaron de pertenecer a la magistratura para luego entrar a desempeñar cargos políticos ejecutivos o electivos. A título de ejemplo, en Jujuy, el Dr. Pablo Blas,<sup>11404</sup> --quien hacía tiempo venía siendo presionado por el Gobernador de Salta Cnel. Juan Solá-- presentó la renuncia a la Gobernación de Jujuy a cambio del Juzgado Federal, prometido primero por Francisco J. Ortiz y luego por el Cnel. Juan Solá y Don Plácido Sánchez de Bustamante.<sup>11405</sup> El Juzgado Federal le fue otorgado en premio de sus maquinaciones por engañar a Domingo T. Pérez y por medio de este al Presidente de la República (Roca), pues la Gobernación había recaído finalmente en otro Uriburista (Tello). También hubo varios casos de Jueces que antes de haberse incorporado a la Justicia Federal se habían desempeñado en la docencia secundaria y universitaria. Hubo asimismo casos como el de José Manuel Arias, Abrahám Cornejo, y Ramón Febre, que ocuparon cargos políticos antes y después de su transitorio desempeño en la Justicia Federal.

## **F-VIII La carrera judicial propiamente dicha.**

Para aquellos Jueces que desistían de pasarse a la carrera política y que optaban por permanecer en la carrera judicial, la esperanza de promoción consistía en ser transferidos a una sede más trascendente. En el caso del Juez Federal Nataniel Morcillo, fue trasladado de La Rioja a San Juan. Entre otras apuestas de ascenso en la carrera judicial, figuraba la de vocal de la Cámara Federal o integrante de la Corte Suprema.<sup>11406</sup> En Santa Fé, Juan Álvarez, Pedro Morcillo Suárez, Nicolás Vera Barros, Benigno T. Martínez y Santos J. Saccone fueron promovidos, de Jueces Federales a Vocales de la Cámara Federal. Lo mismo ocurrió en Córdoba con Melitón Arroyo y Nicolás Berrotarán; en Concepción del Uruguay con Alfredo Berduc; en Paraná con Eleodoro R. Fierro; y en Mendoza y San Luis con Jorge Vera Vallejo. En el caso de Abel Bazán, ascendió a Presidente de la Corte Suprema de Justicia luego de haber ocupado entre otros numerosos cargos judiciales el de Juez Federal en La Rioja. Y en el caso de Abrahám Cornejo, luego de haberse desempeñado como Ministro de la Corte de Salta es designado Juez Federal en dicha provincia.

Cuando la transferencia judicial consistía en un destino más lejano o de menor jerarquía esta era sentida más como un castigo, producto de la intransigencia política de la víctima. En San Luis, cuando el Gobernador Toribio Mendoza toma conciencia de la incorregibilidad del Juez Federal Donaciano del Campillo --manifestada en la actitud benefactora asumida con los reclutas destinados a la frontera-- le propuso a Roca transferirlo al nuevo Juzgado Federal de Jujuy

"...pues aquí es imposible que marche bien con nosotros por cuanto el móvil de todos sus actos son sus ideas contrarias en la política general, y más hoy más

mañana andará siempre mal con cualquier gobernante que venga siendo de nuestros amigos".<sup>11407</sup>

#### **F-IX.- Las consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y promoción.**

En la designación de los miembros de la magistratura intervenían también consideraciones de índole puramente personal, familiar y de parentesco. De acuerdo a la información genealógica que he podido recoger, gran parte de la elite judicial tenía alguna conexión familiar con las clases dominantes terratenientes y comerciales. En Santa Fé, el clan de los Rodríguez del Fresno, que la había gobernado por décadas, había caído en una cruel lucha intestina, cuyos embates por intereses económicos se hicieron sentir a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país.<sup>11408</sup> El Tribunal Supremo de Santa Fé, que se hallaba sospechado de parcialidad,<sup>11409</sup> en oportunidad de la vacante del Juez Federal Donaciano del Campillo,<sup>11410</sup> y frente a la postulación de los Dres. Cullen y Saturnino Salvá, el Interventor Pedro Nolasco Arias,<sup>11411</sup> le sugería al Presidente Roca proponer como candidato de transacción al Juez de Primera Instancia Dr. José Miguel Salvá "...que me consta tiene motivos de adhesión personal hacia tí, hasta por la tradición de la familia Figueroa de Salta, a la que pertenece la madre".<sup>11412</sup> En el caso de Entre Ríos, a fines del siglo pasado, la situación era angustiante, por cuanto el gobierno de Salvador Maciá, amigo del Gobernador Santafesino José Gálvez, se había desacreditado, pues el pueblo

"...vé a su administración de justicia sirviendo los intereses de una familia, los puestos públicos ocupados por miembros de ella, sus rentas invertidas en paseos y giras políticas, y que no se hace el servicio de su deuda externa".<sup>11413</sup>

Sin embargo, a juicio de Carlos M. Zavalla,

"...si recorremos los distintos poderes públicos de la provincia, [vemos] que en la Cámara de Justicia no hay ningún pariente ni afin de las familias enunciadas".<sup>11414</sup>

Por el contrario, en Catamarca, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Pío Cisneros,<sup>11415</sup> y el Presidente de la Legislatura Adolfo Castellanos, eran primos del Gobernador Julio Herrera González.<sup>11416</sup> En San Juan, Carlos Doncel sucedió en el Juzgado Federal a su suegro Nataniel Morcillo "...y se lo ha transmitido a un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a [Rafael] Igarzábal".<sup>11417</sup> Y en Salta, el Gobernador Francisco J. Ortiz elevaba un Recurso de Queja en apelación directa ante la Corte Suprema contra el Juez Federal Federico Ibarguren,<sup>11418</sup> designado por el Interventor Bernardo de Irigoyen, pues éste era

"...un instrumento vil y ciego de la familia Uriburu de que es miembro, y en todo asunto político o civil en que alguno de nuestros amigos es parte hace servir su puesto por venganzas inicuas".<sup>11419</sup>

Ibarguren, a juicio de Juan Solá, "...no podía ser nunca imparcial, desde que toma una participación activa en nuestros asuntos políticos en pro de sus parientes".<sup>11420</sup> El Presidente Avellaneda se ha equivocado, le aseguraba Ortiz a Victorino de la Plaza, "...al creer que no hay aquí más gente que valga que los Uriburu".<sup>11421</sup> Estos están

"...ya en quiebra y bajo la acción de los Tribunales, y es muy probable que el Senador [Luis] Linares, que ha sido declarado en quiebra, reciba la declaración de fraudulento y tenga el Juez que pedir su desafuero".<sup>11422</sup>

La Lista J y el Apéndice K nos revelan la información familiar y de parentesco de medio centenar de jueces, camaristas, miembros integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Procuradores Fiscales y Vocales de las Cámaras Federales con sus respectivos apellidos maternos. Los lazos sanguíneos eran una instancia decisiva en la carrera judicial de algunos de los Jueces incluidos en la Lista mencionada.<sup>11423</sup> El matrimonio fue también para algunos jueces un elemento coadyuvante en dicha carrera judicial. De 58 casos en que conocemos el apellido de su respectiva cónyuge, en sólo cinco, o casi el 10%, hallamos un concreto ascenso social. En efecto, los matrimonios de los Doctores Barco, Carenzo, Febre, Granillo y Pulo Meriles significaron su incorporación a las elites locales respectivas. Sin embargo, en la mayoría de los casos registrados encontramos que los Jueces y sus respectivas cónyuges pertenecen, por filiación paterna y/o materna, a las elites locales.<sup>11424</sup>

Por último, podemos concluir que la falta de independencia de la justicia, los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes judiciales del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

## Capítulo V-B-7      **Burla del ciudadano y el comicio como encrucijada bélica.**

### Índice

- G-I.- Tradición historiográfica en materia de crisis político-electoral
- G-II.- Evolución del sistema electoral argentino.
- G-III.- Reminiscencias estamentales en el régimen electoral.
- G-IV.- Niveles de participación político-electoral.
- G-V. Violencia electoral.
- G-VI. Venalidad y clientelismo en el régimen electoral.
- G-VII. Fraude censal.

### **Introducción al capítulo V-B-7**

En el desequilibrio de las fuerzas políticas, aparte de las tradicionales rupturas o formas violentas de transición del poder (golpes, *putschs* y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas por lo general en fracturas genéticas,<sup>11425</sup> también tuvieron lugar otras formas conflictivas (desajustes o involuciones) más sutiles e institucionales (fraudes electorales, sectarismos docentes y eclesiásticos, censura periodística, corrupción de la justicia, espionaje postal y telegráfico; y diagramación y localización interesadas de ramales ferroviarios, capitales provinciales, juzgados federales y colegios nacionales), fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales).<sup>11426</sup>

El mecanismo inicial de representación estamental (el capitular), legado histórico de la colonización Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número de los elegibles (voto pasivo) y de los electores (voto activo) a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba al parlamentarismo pre-republicano de los Cabildos y la administración de justicia que de él dependía en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.<sup>11427</sup> La polarización de las elites en términos de una representatividad pre-moderna (estamental y territorial o geográfica), fue seguida --a juicio de Zagarri (1988) y Gibson (1996)-- por una representatividad puramente moderna (poblacional o demográfica).<sup>11428</sup> A estas tesis se suman también las tesis de la gestación de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica, de Panebianco (1988). Estas estrategias estuvieron combinadas con salidas electorales fraudulentas, aceleradas y distorsionadas debido a una diagramación interesada de los medios de comunicación y transporte (Telégrafos, Ferrocarriles), y una localización condicionada de los centros de poder (capitales de provincia, juzgados federales, colegios nacionales, centros de retransmisión telegráfica, etc.).<sup>11429</sup> Estas distorsiones hicieron que las elites del interior tomaron conciencia de la necesidad de participar del control de la metrópoli porteña, o en otras palabras, de la necesidad de su federalización.<sup>11430</sup>

Cabe entonces, en el marco de estas tesis, formularse la siguiente pregunta:

¿las innovaciones institucionales (elecciones, colegios electorales, bicameralismo y diagramación y localización de capitales provinciales, juzgados federales, ramales ferroviarios y corresponsalías de diarios capitalinos) fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o, por el contrario, se corrompieron reproduciendo las miserias de un estado autocrático y de lo que se dio en llamar un estado oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas)? ¿estas innovaciones institucionales en el campo político se compadecían con los niveles vigentes en la administración de justicia, en el régimen educativo, y en la estructura comunicacional (periodismo)?

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los discursos localizables,<sup>11431</sup> ni una historia de las gestiones de gobierno, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron frente a diversas leyes electorales y frente al comportamiento político de diversos actores públicos (funcionarios, periodistas, jueces, rectores, profesores, militares, gerentes de bancos, parlamentarios, sacerdotes, etc.).

Amén del régimen republicano, los regímenes representativo y federal de gobierno eran en nuestro país una utopía. En el caso de la legislación electoral, la necesidad de su modificación obedecía a que el sufragio universal, la inscripción en el Registro Cívico, la insaculación de los jueces electorales, la constitución de los comicios y la práctica de los escrutinios, elementos y escenarios centrales de la política moderna, del régimen representativo de gobierno y de la movilización y participación de nuevos segmentos de la sociedad hasta entonces ajenos a la política --incentivado tras el influjo de la Comuna de París (1870)-- eran una ficción democrática pues en dicha política y dicho régimen regía una suerte de fraude estructural o pre-moderno (genético), fundado no solo en la naturaleza de los mecanismos comiciales y puramente electorales, sino también en la naturaleza patriarcal de la administración de la justicia electoral.<sup>11432</sup>

Si bien había sido posible erradicar parte de la estructura estamental, censitaria, señorial, nepótica y étnica heredada de la modernidad colonial-absolutista,<sup>11433</sup> separar parcialmente la Iglesia y el Estado;<sup>11434</sup> y ampliar los niveles de competitividad política garantizando las libertades de expresión, prensa y asociación, no había sido aún posible erradicar el fraude electoral y los métodos facciosos de acceso al poder (putschs, asonadas, motines), heredados de la anarquía, las guerras civiles y la restauración absolutista (dictadura Rosista);<sup>11435</sup> ni el peligro de disgregación territorial que la emulación de ficciones nacionales (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) provocaba, es decir "...la atribución de soberanía a naciones que seguían siendo en su mayoría entidades ficticias".<sup>11436</sup> Pero pese al fraude electoral, la movilización política de grandes sectores subalternos de la sociedad de entonces, urbanos y rurales, estaba parcialmente garantizada por haber tenido lugar en dichos eventos una movilización organizacional, y una movilización psico-social e ideológica (afiliación, militancia).<sup>11437</sup>

### **G-I.- Tradición historiográfica en materia de crisis político-electoral**

Para todo el período que arranca con la Organización Nacional y para todo el interior argentino Sábato y Palti (1990) formularon inspirados en Habermas (1989), la tesis de la universalidad del sufragio y el carácter estructural de las transiciones por transacción o sucesión (pactos, fraude electoral).<sup>11438</sup> Por el contrario, Pavoni (1995) refuta a Sábato y Palti (1990), y a Sábato (1992), resaltando que en el interior de Argentina las leyes electorales no respetaron el principio del sufragio universal.<sup>11439</sup> Y Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio".<sup>11440</sup> Respecto a las salidas electorales, las estrategias de dominación estuvieron universalmente determinadas por la intensidad de la movilización política, argumento sostenido por Borón (1972); y por la intensidad de la venalidad política, o compra-venta de votos, tesis formulada por Buchanan y Tullock (1962, 1993). Pero a diferencia de McEvoy (1994), en su tratamiento del caso Peruano, lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dio en ese entonces entre las campañas y regímenes electorales y las administraciones comunicacionales (periodismo y telegrafía), judiciales y educativas.<sup>11441</sup>

### **G-II.- Evolución del sistema electoral argentino.**

En la evolución del sistema electoral argentino, De Micheli (1991) distingue siete (7) etapas distintas, siendo la primera la que se extiende desde la primera ley electoral promulgada en 1857, hasta la Ley Sáenz Peña, comprendiendo en dicho período cerca de media docena de leyes.<sup>11442</sup> Cada una de dichas leyes nacionales significaron --aplicando las tesis de Rusk (1970) y Converse (1972)-- profundos adelantos en la vida electoral del país, que al dotar a nuestro sistema constitucional de un contenido de acuerdos fundamentales permitió explicitar

"...la alegación a la soberanía y a la voluntad del pueblo...como uno de los contenidos concretos de nuestra Constitución a través de las normas consiguientes".<sup>11443</sup>

Al no tener nuestra Constitución normas relativas al régimen electoral y a los partidos políticos la legislación electoral "...complementó en el orden valorativo los principios de nuestra Constitución".<sup>11444</sup> Como cada una de dichas leyes significaron progresos relativos, en este trabajo he de tratar de desagregar la periodización establecida por De Micheli. A

esos efectos, los argumentos para impugnar o defender la legislación electoral girarán esencialmente alrededor de experiencias concretas.

En las elecciones de mediados del siglo XIX, existían las mesas inscriptoras de sufragantes y las mesas receptoras de votos así como también los juicios y términos de tachas, semejantes a los vigentes en la modernidad colonial-absolutista.<sup>11445</sup> En un comienzo, dictada la Ley 140, del 16 de Septiembre de 1857, que rechazó las cláusulas limitacionistas de las Constituciones Provinciales,<sup>11446</sup> los votos se computaban en forma individual "...princiando por [el candidato] que hubiere obtenido mayor número y siguiendo los demás en el mismo orden".<sup>11447</sup> De tal manera, que era factible teóricamente, a juicio de Vera Villalobos (1994), que triunfaran candidatos de distintas listas, según el número de votos obtenidos por cada individuo. Sin embargo, en la práctica, esto no era así, porque los niveles de participación política eran tremendamente limitados, debido al fraude, al analfabetismo y a la arbitrariedad reinante.

### **G-III Las reminiscencias estamentales en el régimen electoral.**

En los momentos electorales, las instituciones donde más se observaban las invasiones de un poder del estado en otro y las arbitrariedades eran: a) la Junta Electoral,<sup>11448</sup> compuesta por los Jueces Federales y los Presidentes de la Legislatura y el Tribunal de Justicia, y b) la Justicia de Paz, responsable de administrar la justicia electoral.<sup>11449</sup> Era en esta última donde más recaían los reclamos de prescindibilidad electoral.<sup>11450</sup> La participación política de nuevos segmentos de la población consistía primero en la movilización electoral.<sup>11451</sup> Para ello, era preciso que los sufragantes, previo a la emisión del sufragio, se inscribieran en el Registro Cívico o padrón. Luego, en el comicio, durante la emisión del sufragio, regía una tácita e informal prelación o discriminación estamental pues primero votaba la llamada gente decente y recién a renglón seguido el común o pueblo llano.

En especial en los ámbitos rurales, el electorado no concurría a los comicios individualmente sino que lo hacía integrando contingentes y por lo general armados. Para lograr la participación de dichos contingentes era preciso encarar grandes gastos. En los centros urbanos, como el pueblo era por lo general semi-alfabeto y estaba agremiado a sociedades o corporaciones artesanales o nacionales, para movilizarlos electoralmente e invitarlos a militar o competir políticamente era preciso invertir en medios y operaciones de prensa. Por de pronto, la Junta Electoral informaba en la década del 90 "...que donde había periódicos se ha hecho la publicación [de los registros]".<sup>11452</sup> En Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el periódico El Mendocino,

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo cervical) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos va a comer a todos sin peligro de que alguno se indigeste".<sup>11453</sup>

Pero en las zonas rurales, donde prevalecía el analfabetismo, para movilizar electoralmente al campesinado era preciso cooptar caudillos y estancieros. Por lo general, en estos lugares los Jefes Políticos y los Comandantes de Milicias traían los contingentes de milicianos, que con su concurrencia volcaban el resultado de los comicios. En Salta, en

1854, el que luego fuera Gobernador, Manuel Puch,<sup>11454</sup> designó la mesa escrutadora "...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y poncho calado, gritando por Don Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria afirmativamente".<sup>11455</sup> De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo diez personas, permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".<sup>11456</sup> En Tucumán, tanto en la Capital como en los Departamentos, no se lograba reunir la masa de partidarios "...sino se les da para almorzar o para cualquier cosa, pero es preciso darles".<sup>11457</sup> En la campaña "...hay que darles caballos a casi todos, y como se les lleva de los establecimientos donde trabajan, al punto A o B donde está la mesa hay forzosamente que gastar".<sup>11458</sup> Y en Santiago del Estero, para hacer una manifestación política en la campaña

"...es necesario prepararla con anticipación y promover fiestas ya sean riñas o carreras, darles bebida a los hombres, carne con cuero, etc. y animarlos bastante hasta que pierdan el miedo a la autoridad que no deja de hacer sentir siempre contra nuestros amigos".<sup>11459</sup>

Las elecciones, antes y después de la unificación nacional (Pavón), solían durar varios días debido a las distancias y la precariedad de las comunicaciones. Uno de los defectos principales de la ley 207 (1859) de elecciones, puesta en vigencia en todas las provincias después de Pavón (1862), era al decir del Diputado Nacional Rufino de Elizalde "...que las elecciones se hacían en tres días, manteniendo por muchos días la agitación electoral".<sup>11460</sup> Es entonces que el Congreso, a mediados de Noviembre de 1863, dicta la ley 75, que se comunica a toda la República, ordenando hacerse en toda ella Registros nuevos, y

"...arreglando todos los términos, es decir: mandó abrir el registro cívico el segundo domingo de Diciembre del año 63, mandó cerrar el registro cívico el segundo domingo de Enero del 64; dió un mes para las reclamaciones y para la publicación hasta el 15 de Febrero que tuvo lugar la elección de Diputados".<sup>11461</sup>

Este requisito de la inscripción previa de los sufragantes fue de difícil cumplimiento, por cuanto la población rural se rehusaba a enlistar, temerosa de ser convocada para o por la leva. En Salta, Isidoro López Plaza,<sup>11462</sup> fue elegido Diputado Nacional en una elección popular, donde al igual que todas las anteriores fue hecha "...sin la inscripción previa de los sufragantes en el Registro Cívico, por cuanto este no ha sido abierto hasta hoy por graves inconvenientes para ello".<sup>11463</sup> El inconveniente fue, según López Plaza, que para esos días, reunido los contingentes de milicias, los gauchos que las integraban, acostumbrados a eludir la leva, "...lo que menos querían era que los apunten para cosa alguna".<sup>11464</sup> Sin embargo, los enemigos políticos de López, en Buenos Aires, el Diputado Nacional por Salta Pedro Uriburu y los Diputados Nacionales por Tucumán Nabor Córdoba y Julián Murga, conocidos por "mazorqueros" o Derquistas, alegando el incumplimiento de la ley 75 no estaban dispuestos a aprobar la elección de Salta. Por ello López le confesaba a su primo político el Juez Federal de Santiago del Estero, Dr. Próspero García, que no iría a Buenos Aires a procurar su aprobación

"...pues no es justo viajar 500 leguas a pedir a esos Sres. que hagan su deber o que hagan justicia sino que esperaré aquí que hagan lo que quieran, y esperaré el resultado, sea el que fuere".<sup>11465</sup>

De hecho López no fue a Buenos Aires y su diploma no fue aprobado, perdiendo con ello el parlamento argentino a uno de los más lúcidos políticos que asomaron después de Caseros.<sup>11466</sup>

Para 1873 y debido al fraude generalizado que se registraba en los Comicios fue dictada una nueva ley electoral (Ley 623) que prescribió el tiempo, modo y forma en que habían de hacerse las elecciones de diputados al congreso nacional.<sup>11467</sup> En esa oportunidad se discutió el modo de emisión del voto, es decir si debía ser público o secreto. Mientras los Diputados Manuel Montes de Oca, Bernardo de Irigoyen, Rafael Igarzábal, Pedro Goyena y otros "...se manifestaban en favor del voto secreto", el proyecto sancionado estableció el voto público.<sup>11468</sup> Sin embargo, veinte años después, el Diputado Nacional Adolfo Dávila afirmaba que no era exacto que en Argentina se haya seguido el sistema del voto público, tal como lo afirmaba el Diputado Nacional José Cortés Funes, y que tampoco era exacto que el sistema argentino fuera el del voto secreto. Para Dávila, se conocieron para ese entonces, el año 1874, tres sistemas de votación: el voto público u oral, el voto escrito simplemente, y el voto secreto.<sup>11469</sup> En última instancia, Dávila recordaba que se sancionó

"...una fórmula mixta, una fórmula de transacción, exactamente igual, por rara coincidencia, a la ley inglesa de 1872, sancionada después de haber oscilado la discusión, en la Cámara de los Comunes y en la de los Lores, entre las dos teorías extremas".<sup>11470</sup>

Por otro lado, la ley establecía un doble quorum para que una elección fuera aprobada. En efecto, el Diputado Dávila afirmaba que la ley estableció "...un quorum de actas para que proceda un escrutinio legal, y establece otro quorum de actas para que proceda una elección legal".<sup>11471</sup> Mientras que para que proceda un escrutinio legal, "...se necesita dos tercios del total de las secciones electorales de cada provincia; para que proceda una elección legal, se necesita solo la mitad más uno del total de las secciones, de elecciones válidas".<sup>11472</sup>

Tan era así, que cuando algún partido o facción política pretendía privar de la victoria electoral a su opositor bastaba para ello que se adueñara de una porción de actas del Registro Cívico, lo que además impedía la desinsaculación de los escrutadores o integrantes de las Mesas. En Salta, cuando en vísperas de las elecciones de Febrero de 1876, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz, comenzó a indagar a sus partidarios por las inscripciones del Registro Cívico resultó

"...que en época pasada, cuando los Uriburu dominaban, habían recogido todas las inscripciones de manera tal, que no contábamos con qué hacer votar a la inmensa cantidad de jente que teníamos".<sup>11473</sup>

Asimismo, la ley de 1873 mantuvo intacta la regla de la pluralidad o Lista Completa y la unidad territorial de los distritos, pues

"...los ciudadanos votaban desde un distrito por una lista de candidatos: por lo tanto, la lista que obtenía el primer puesto en la carrera electoral arrastraba consigo la totalidad de las bancas o cargos de elector en disputa".<sup>11474</sup>

La aplicación de esta ley dio lugar a lo que se denominaba votación alternativa, una suerte primitiva de lo que hoy se conoce por Ley de Lemas.<sup>11475</sup> En Malazán, La Rioja,

"...dos fracciones, una con el nombre del Dr. [Manuel] Quintana, otra con el nombre del Dr. [Adolfo] Alsina, sostenían la candidatura del Sr. Diputado que presenta el diploma [Guillermo San Román], y solo había un partido que sostenía la candidatura de su opositor o rival".<sup>11476</sup>

La mesa electoral, al recibir la votación, "...consideraba como partidos distintos a cada una de las fracciones que sostenía la lista del Dr. San Román, y recibían un voto de cada uno de los tres partidos".<sup>11477</sup> De tal manera que mientras los partidos daban dos votos al Dr. San Román, "...el otro por ser solo, no daba sino un voto a la candidatura contraria".<sup>11478</sup> Esto era para el Diputado José Benjamín de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".<sup>11479</sup>

Pero tan generalizado se hizo el fraude electoral, a raíz de las debilidades de la ley 623, que en 1877 y como resultante de la Conciliación arribada entre Liberales y Autonomistas, se dictó la Ley 759, que dispuso para toda elección nacional que debía hacerse previamente la inscripción en el Registro Cívico Nacional.<sup>11480</sup> Para ello, la Junta inscriptora debía remitir

"...copias de los registros de inscripción directamente al Juez Nacional para que este remita uno a la Cámara de Diputados y ponga otro a disposición de la Junta, para que ésta, en presencia de él, pueda hacer la insaculación de las mesas receptoras de votos".<sup>11481</sup>

#### **G-IV.- Los niveles de participación político-electoral.**

Más adelante, durante la llamada Generación del 80, pese a los altos niveles de competitividad política (libertades de expresión, prensa y asociación), y las prescripciones constitucionales y legales vigentes, los niveles de participación política permanecían aún muy limitados, pues las prácticas electorales continuaron siendo clientelísticas y esencialmente fraudulentas. Cuando no se negaba la publicidad de los padrones, producidos por el Registro Cívico Nacional, para desinsacular los escrutadores o integrantes de las Mesas, que era un derecho garantizado por la Constitución Nacional, se formaban mesas dobles, al "estilo Elizalde",<sup>11482</sup> o se robaban directamente las actas resultantes de las elecciones. En Corrientes, los Mitristas fueron los que al no poder luchar en la elección legal organizaron en grupitos las llamadas mesas dobles.<sup>11483</sup> En Monteros, una localidad de Tucumán, a fines de Diciembre de 1885, ya no había esperanzas de que publiquen el Registro Cívico, y la razón de ello era que "...el mismo Secretario y Juez de la Mesa están en todas las series, es decir cuatro veces".<sup>11484</sup> Desde La Rioja, el ex-Diputado Nacional Guillermo San Román,<sup>11485</sup> le ratificaba a Dardo Rocha que la Junta insaculadora para la formación de las mesas de calificación y las mesas electorales "...nos asegura sino mesas nuestras por completo, en su mayoría favorables y en otras imparciales".<sup>11486</sup>

El Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 orden de prisión contra el Vice-Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político rochista Guillermo San Román "...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional [refiriéndose por cierto al padrón del Registro Cívico Nacional]".<sup>11487</sup> El suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a Catalán el resultado de una insaculación fraudulenta, por haber sido hecha antes de vencerse el término de tachas, el

30 de diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la Provincia "...que por las distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al Juzgado Federal el 9 del corriente".<sup>11488</sup> Por ese motivo, la Junta Electoral,<sup>11489</sup> se había reunido el 10 de enero de 1886 en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjueces. Pero el Ministro de Gobierno Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, desconoció por decreto a la Junta Electoral y dio orden "...para que sean perseguidos y reducidos a prisión todos los Conjueces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su mandato".<sup>11490</sup> Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales sorteados.

En realidad, aquel fraude fue la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que Catalán había hecho antes de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San Román, la Corte provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que éste optó por fugarse a Córdoba.<sup>11491</sup> Días más tarde, el Tribunal Supremo de La Rioja fue intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial, recayendo la intervención en el Camarista Dr. Lorenzo J. Torres,<sup>11492</sup> y la Junta Escrutadora modificada para otorgarle mayoría al situacionismo.<sup>11493</sup> No obstante, la modificación de la Junta Escrutadora, el oficialismo no se hallaba seguro de su triunfo, pues

"...nuestros agentes, que partieron a la campaña, principian a ser asaltados en los caminos y constituidos en prisión, lo mismo que muchos de nuestros amigos, por partidas armadas que el Gobierno, cumpliendo con las instrucciones traídas por el Ministro Pereyra últimamente, ha apostado en los caminos y puntos de tránsito, para cortarnos toda comunicación con las poblaciones de campaña".<sup>11494</sup>

En Salta, tan severa y temeraria era la exclusión de la oposición de la cosa pública, que en 1884, según Feliz M. Saravia,

"...cuando un individuo resulta electo Diputado a la Cámara Provincial se roban las actas y se vá hasta el extremo de no convocar a ese Departamento a una segunda elección, si el resultado no ha de ser en favor de un situacionista".<sup>11495</sup>

Y en 1886, la zurrapa denunciada por el Rochista Inspector de Telégrafos Luis del Carril,<sup>11496</sup> consistió en dejar sin desinsacular (elegir los escrutadores de las Mesas Electorales) los Departamentos dominados por la oposición so pretexto de no haberse publicitado a tiempo los Registros.<sup>11497</sup> Carril le informaba a Rocha que

"...nosotros hemos hecho buscar los Registros de los Departamentos no insaculados para reclamar de la Junta la insaculación que les corresponde y en caso que ella niegue la insaculación, nos presentaremos acusándola, sin perjuicio de hacer la elección con los insaculados para formar las mesas de Febrero".<sup>11498</sup>

En Catamarca, en las elecciones para Diputados, convocadas en 1884 por el Interventor Onésimo Leguizamón, el día de la elección, según contaba el Senador Nacional Manuel F. Rodríguez,

"...se hizo votar el número de sufragantes convenido [con la oposición] y haciéndolo solamente las personas decentes".<sup>11499</sup>

Sin embargo, como se había reunido gente del pueblo, es decir de la llamada plebe, Lúndor B. Sotomayor me aseguró

"...que esa gente no votaría y que con ese objeto tenía un agente entre ella, permaneciendo todo tranquilo, me retiré a casa", <sup>11500</sup>

Pero a las 12 del mediodía, "...Sotomayor me hizo decir que lo ayudase a contener la jente", <sup>11501</sup> que con Guillermo Castaños a la cabeza

"...pretendía votar por otra lista. No pudiendo ir personalmente, mandé a un hijo mío y fueron avisados los situacionistas que nada hicieron por impedirlo, pues que hasta los miembros de las mesas que pertenecían a ellos habían estado en el complot, y el hecho se consumó contra nuestra voluntad y deseos". <sup>11502</sup>

Finalmente, las elecciones las perdió el oficialismo. Según el Interventor Onésimo Leguizamón, <sup>11503</sup> la elección

"...ha sido tumultuosa durante la primera hora, pero habiéndose apercebido de la causa, que eran los fraudes de dobles o triples votaciones y desórdenes consiguientes, y creyendo que elecciones presididas en tu nombre [Roca] no debían ser solo libres, sino honradas, ordené que los ciudadanos después de haber sufragado fuesen vigilados en grupos separados correspondientes a las dos mesas y a los dos partidos". <sup>11504</sup>

Al principio, los representantes del gobierno aceptaron la medida, como justa, imparcial y tranquilizadora; pero, después de una hora, viéndose sin votos,

"...reclamó de la vigilancia de sus amigos pensando echar mano de ellos para preparar sin duda nuevas emisiones de votantes. Yo [Leguizamón] mantuve la disposición, sin perjuicio de proceder a dejar en libertad completa a la parte decente, ocupada o enferma, y esto ha originado la protesta frívola de Ocampo y pocos amigos por actos que no afectan a la libertad del sufragio ni a la condición política de los ciudadanos". <sup>11505</sup>

Las mesas, totalmente favorables a la situación, porque eran las antiguas,

"...comenzaron entonces a rechazar los votos de la oposición a pretexto de cambio de nombre, falta de edad, etc., y como estaban en mayoría, su decisión hacía ley". <sup>11506</sup>

Apercibido de estas arbitrariedades, por denuncia de los comisarios, Leguizamón se trasladó personalmente al atrio, y

"...por medio de reflexiones, advertencias y llamamientos amistosos a la equidad y honradez política conseguimos que el acto continuase sin interrupción hasta su término, no habiendo motivo para lamentar incidente alguno, sino la gritería grosera de Rodríguez y Castro que hubieron de perjudicar sus fueros en un momento en que se insolentaron injustamente con el Comisario Galiano". <sup>11507</sup>

En las elecciones para Diputados convocadas en 1884 por el Interventor Leguizamón, dos de ellas fueron ganadas por la oposición. En Pomán, un capitán que había mandado la intervención con un Piquete de Línea so pretexto de garantizar la libertad electoral, emitía

"...toda clase de amenazas, hasta de fusilar a nuestros amigos y echar a las tropas de línea al Juez Departamental".<sup>11508</sup>

En la Capital de Catamarca, un oficial de la Intervención fué "...hasta el grado de andar encabezando grupos electorales y tomando y rompiendo boletos de nuestros amigos".<sup>11509</sup> Y todo este lujo de hostilización era

"...para hacer Diputado en Pomán al Presidente de la Asociación Católica y en la Capital a uno de sus miembros más exaltados. En La Paz ganó el partido situacionista a fuerza de tener el Departamento en masa, no habiéndose podido vencer nuestra mayoría ni poniendo en la cárcel a los agentes principales de la autoridad, como lo hizo otro Destacamento de fuerza de línea mandado por el Interventor".<sup>11510</sup>

Un año después, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino,<sup>11511</sup> le confesaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, a la sazón oficialista, pues

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".<sup>11512</sup>

Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que como consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas receptoras de votos".<sup>11513</sup>

A juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, los Jueces de Paz eran en 1882 "...con arreglo a nuestro sistema electoral, la llave de la elección". Estaba en manos de los Jueces de Paz de toda la República la pureza del sufragio,

"...porque son los Presidentes de las Juntas que hacen la inscripción de los ciudadanos, es decir, la calificación de los votantes, y bastaría que un Juez de Paz, pusiera entorpecimiento a un reclamo, para que un voto falso quedase en la inscripción, o para que un voto válido no fuese recibido en ella. Son, además de los funcionarios que dirigen la inscripción, los Presidentes de los Tribunales de Apelación por inscripción indebida....Son ellos los que deben entregar las urnas y los registros".<sup>11514</sup>

Y treinta años después, para el Diputado Nacional por Corrientes Adolfo Contte, los Jueces de Paz "...tienen a su cargo el registro civil de las personas; y según la ley nacional de elecciones, los encargados del registro civil son quienes expiden el duplicado de renovación de las libretas deterioradas o extraviadas".<sup>11515</sup>

## **G-V.- La violencia electoral.**

La violencia siempre estuvo íntimamente vinculada con las elecciones provinciales y nacionales convocadas periódicamente por los gobiernos.<sup>11516</sup> Para Pepe Posse, (a) "El Doctor Amoníaco",<sup>11517</sup> elecciones "...en el sentido legal y republicano no ha habido en ninguna parte".<sup>11518</sup> Hasta donde alcanzaron las fuerzas de Línea, bajo las órdenes de los Gobernadores del Presidente Roca, las elecciones se hicieron según Posse "...aparatos de votaciones escluyendo opositores, encarcelando, persiguiendo o amenazándolos con las culatas de los remington para alejarlos de las mesas".<sup>11519</sup> Ahora, decía Posse en Febrero de 1886, a dos meses de las elecciones de Abril, "...no hablemos de Juárez, que es para mí un muñeco político con entrañas de acerrín, no es él quien ha triunfado es Roca con sus sistema de fuerza".<sup>11520</sup> Posse, en un raptó de voluntarismo político, concluía que no se podrá fundar gobierno regular según nuestras aspiraciones y nuestros deseos,

"...sino barriendo el suelo, triunfando con la lucha sobre la lucha, deshaciendo hasta los cimientos la obra de este soldado brutal que corrompió hombres e ideas para fundar el poder más cínico y corrupto de la que se recuerden en la historia de las repúblicas sud-americanas".<sup>11521</sup>

En 1885, desde Tucumán Lídoro Quinteros le advertía al rochista Luis del Carril que

"...conviene apoderarse de la Junta insaculadora, cosa que se obtendrá por el nombramiento del Juez Federal y por medio del Presidente de la Cámara de Justicia que es el Interventor Nacional del Banco Muñoz, el Dr. Oliva".<sup>11522</sup>

En Agosto de 1885, en vísperas de un acto electoral, V. López Cabanillas le informaba a Rocha desde Córdoba que

"...en la noche del sábado las bajadas y avenidas a la Ciudad habían sido ocupadas por fuerzas de policía y que nuestros amigos de los alrededores que se dirigían a la ciudad, eran presos y conducidos a la Policía".<sup>11523</sup>

#### **G-VI.- La venalidad y el clientelismo en el régimen electoral.**

Frente a la soberbia de la fuerza bruta, no había otra forma de ganar elecciones que recurriendo a la venalidad, es decir comprando escrutadores mediante el dinero.<sup>11524</sup> Desde Jujuy, en Febrero de 1886, el Gobernador J. M. Álvarez Prado,<sup>11525</sup> le informaba a Roca que a consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y expuesta a sucumbir por falta de armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial".<sup>11526</sup> Al parecer esta acusación era cierta, por cuanto en abril de 1886, Pío Uriburu le escribe a Luis M. Campos confesándole con gran sagacidad y realismo que en Jujuy

"...tenemos que vencer con dinero, pues en todos los Departamentos el Gobierno ha mandado fuerzas y los Escrutadores insaculados son enemigos. Hemos vístonos en el caso de tener que comprar a los Comisarios, escrutadores, etc.; pues careciendo de armas no tenemos otra arma que el dinero, de la que hay que valerse para contrarrestar la fuerza".<sup>11527</sup>

En Santiago del Estero, practicando nueva insaculación de escrutadores, tal como lo disponía la Ley Electoral, el Gobernador Absalón Rojas le aseguraba a Juárez Celman que

mejoraríamos el resultado electoral "...eliminando aquellos sospechosos y también aquellos que por sus humildes condiciones pueden ser ventajosamente reemplazados".<sup>11528</sup> Y como la Ley Electoral disponía que treinta días antes de cada elección debía hacerse una nueva insaculación de escrutadores, Absalón Rojas le comentaba a Juárez Celman, que

"...es indudable que la oposición ha conseguido comprarse algunos escrutadores en 2 o 3 Departamentos para hacerlos firmar actas falsas hechas antes o después de la elección y es indudable también que sigue sus trabajos en este sentido no solamente para obtener que les firmen estas actas, aunque sean dos o tres escrutadores, sino que pretenden conquistarlos para la otra elección, ofreciendo fuertes sumas de dinero".<sup>11529</sup>

En Catamarca, en 1886, en oportunidad de las elecciones Presidenciales, el Gobernador José S. Daza le denunciaba a Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los Departamentos,...a ver si corrompen a los conjuces por medio del dinero".<sup>11530</sup> Para ello, según Daza, "...tendrán que fundir el Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus guaridas, no cuentan con un sólo hombre [escrutador] en las mesas [electorales]".<sup>11531</sup>

Para fines de siglo, el acto electoral de renovación de la Cámara no era, para el Diputado Nacional Benito Carrasco, un acto simple,

"...sino un acto complejo, que tiene una infinidad de actos preparatorios, como son la formación del padrón electoral, como es por consiguiente, la insaculación y el sorteo de los ciudadanos que deben presidir la formación del registro; como es, después, el período de tachas; como es, en seguida, el sorteo de las mesas que deben recibir los votos".<sup>11532</sup>

Al no estar la fecha de las elecciones lo suficientemente prescripta por la Ley 623, de 1877, los Gobernadores las fijaban arbitrariamente. Al discutirse el art.44 de dicha Ley, el miembro informante de la Comisión de Legislación Diputado Juan M. Garro,<sup>11533</sup> manifestaba en 1874 que

"...no pueden ocultarse a nadie los inconvenientes que resultarían, si las elecciones de Diputados se verificasen cuando lo estimasen conveniente los poderes de provincia".<sup>11534</sup>

Según el Diputado Garro, las elecciones las estimaban convenientes cuando los Gobernadores "...creen que el momento es oportuno para hacer triunfar sus miras y propósitos".<sup>11535</sup> Esta situación la Cámara no podía ni debía tolerarla; pues la ley debe

"...determinar el tiempo dentro del cual debe verificarse la elección, a fin de quebrar en manos de los gobernadores de provincia esa arma que les da los resultados que buscan, mandando al seno de la cámara a sus adictos".<sup>11536</sup>

Por último, la ley estatuyó dos meses para que se inscribieran todos los ciudadanos que estuvieren en aptitud de votar. Vencidos esos dos meses, el Diputado Nacional Pascual Beracochea sostenía que

"...debe inmediatamente hacerse la publicación de ese registro, para que todos los ciudadanos que tengan reclamos que deducir por exclusión o inclusión indebidas

ocurran ante la misma junta, que al efecto se ha convertido en tribunal de primera instancia, a deducir sus reclamos".<sup>11537</sup>

El art.9 de la Ley establecía que la Junta Electoral se constituía cuando se hubieran cumplido los requisitos de un Registro Cívico: "...dos meses de inscripción, un mes de publicación, un mes para conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por vía de apelación".<sup>11538</sup> Asimismo, la Ley establecía que la publicación del Registro Cívico debía hacerse en los periódicos y, donde no los hubiere, por vía de carteles. Las elecciones de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y La Rioja, practicadas en 1872, adolecieron de vicios flagrantes, pues a juicio del Diputado Nacional oficialista por Mendoza José Vicente Zapata,

"...los registros no han sido publicados en el tiempo que la ley designa; el personal que debían tener las mesas inscriptoras, no fue designado en el tiempo que la ley marca; [y] el personal de las mesas receptoras de votos, tampoco fue nombrado en el tiempo fijado por la ley".<sup>11539</sup>

Para fines de siglo, la venalidad electoral se había extendido a niveles inéditos. Tucumán era una de las provincias donde más se había registrado el fenómeno debido sin duda al boom azucarero. El caso llegó al extremo que mediante la compra-venta de votos, el popular gobernador Lucas Córdoba fue derrotado.<sup>11540</sup>

#### **G-VII.- El fraude censal.**

Finalmente, para impedir una rápida circulación de las elites la oligarquía o clase dominante había generalizado mecanismos desvirtuadores, tales como el fraude censal. Este último consistía en no ajustar la representación parlamentaria a las cifras procedentes de los Censos de Población.<sup>11541</sup> En aquellas provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 3289/95) la oposición fue reclamando perentoriamente su actualización. En 1904, la oposición Puntana le pidió al Interventor Francisco Beazley que solicitara al Ministro del Interior una resolución "...ajustando la representación legislativa al Censo Nacional del 95".<sup>11542</sup> Para el Senador Eriberto Mendoza era "...una verdadera reforma de ocasión y tendiente a favorecer a un partido".<sup>11543</sup> El adoptar el Censo de 1895 era para el Senador Mendoza "...del exclusivo resorte de las autoridades locales, [pues] el Censo es una ley nacional y para efectos nacionales las provincias están en su derecho de adoptarlo o no".<sup>11544</sup> Si en San Luis dicha Reforma no estaba en vigencia, era a juicio de Mendoza porque

"...no se ha podido reformar la Constitución para variar la proporción de tres mil habitantes porque se elige cada Diputado y también porque la adopción del Censo del 69 es prescripción Constitucional y no legal".<sup>11545</sup>

Y en Santa Fé, en 1922, los convencionales reunidos para reformar la Constitución de la provincia se quejaban de que la aplicación del Censo de 1894 no reflejaba con fidelidad "...la población que hoy encierran los departamentos más importantes".<sup>11546</sup>

No obstante toda esta legislación, el fraude electoral se perpetuó aún mas en el tiempo, y hubo que esperar primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, Joaquín V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones uninominales, aunque de voto verbal o cantado,<sup>11547</sup> declarada inconstitucional por el Presidente Quintana, y luego diez años mas,

hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto universal masculino, secreto y obligatorio.<sup>11548</sup> Sin embargo, a partir del 30 hubo que observar nuevamente la restauración del fraude, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la Ley 12.298, por la cual se retornó al sistema de lista completa.<sup>11549</sup> Por último, con el acceso del Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la novedad de incluir en el voto universal al voto femenino. Asimismo, el gobierno Peronista, con el objeto de triunfar como sea rediseñó en la Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja.<sup>11550</sup>

## **Capítulo V-B-8:**

### **Vulnerabilidad de los gremios artesanales frente a las políticas librecambistas**

#### **Índice**

#### **Q-I Fracturas socio-corporativas.**

#### **Introducción del capítulo V-B-8**

Las fracturas de las elites políticas, a las que dieron lugar su profunda heterogeneidad, que derivaron en una permanente inestabilidad de los regímenes políticos, han sido y son de naturaleza pre-moderna, moderna y post-moderna. Aparte de las formas conflictivas más institucionales,<sup>11551</sup> fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales),<sup>11552</sup> tuvieron lugar otras rupturas o transiciones (golpes y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas en fracturas pre-modernas (genéticas).

Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto político organizado.<sup>11553</sup> En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad de sus estructuras pre-modernas (genéticas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (culturales: ecológicas, éticas y estéticas), es decir al hecho de que ciertas líneas de fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia con diversos grados de intensidad.<sup>11554</sup>

En este sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes:

- 1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: geográficas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de tipo moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales)?;
- 2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos,

estamentos y castas?, ¿acepta otra soberanía geográfica que no sea la de la nación, u otras religiones que no sean la católica?;

3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?;

y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno atenúen la politización de las fracturas étnicas heredadas del Antiguo Régimen?.

## **Q-I Las fracturas socio-corporativas.**

En la etapa de la Organización Nacional estuvieron presentes los conflictos nacidos de una fractura socio-corporativa. Los numerosos gremios artesanales (herrereros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.), existentes en Córdoba y las provincias del norte y del oeste, se habían movilizado, pues se hallaban amenazados en la estabilidad de sus oficios por la irrupción masiva de manufacturas importadas, y por las estrategias sociales y políticas orquestadas por las elites urbanas respecto de las clases subalternas.<sup>11555</sup> Cada Asociación de Artesanos poseía patrones culturales distintos con respecto al derecho de propiedad, a la legislación aduanera, a la Ley de Patentes, a la organización de la familia, a los patrones de residencia, a las aspiraciones de ascenso social, etc.<sup>11556</sup> En San Juan, el Gobernador Agustín Gómez había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del Porvenir". En Córdoba, las décadas del 50 y del 60, los miembros de la Sociedad Terpsícore, que agrupaba a los artesanos,<sup>11557</sup> militaron primero en el Club Unión, enfrentado al Club Constitucional,<sup>11558</sup> y luego en las filas de los Rusos,<sup>11559</sup> facción netamente federal --coaligada en la Confederación Argentina con sede en Paraná, y duramente enfrentada a la facción liberal-- que apoyó primero al Gobernador Alejo del Carmen Guzmán y más luego al Gobernador Mateo Luque.<sup>11560</sup> Y en las décadas del 70 y el 80, Tejedoristas, Roquistas y Rochistas se disputaban en toda la República las clientelas de diversos tipos de artesanos, afiliados a distintas asociaciones. Siendo Silvano Bores, (a) "El Zorzal", socio honorario de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, asociación Tucumana donde estaban afiliados todos los jefes de talleres artesanales, afirmaba en 1879 no haberle

"...costado mucho trabajo el desprenderlos de los tejedoristas y convencerlos que los intereses de ellos están vinculados con los nuestros".<sup>11561</sup>

El Club del Pueblo era en Tucumán el centro político que nucleaba a todos los gremios artesanales. Por ser Miguel M. Nogués el fundador de dicho Club tenía de su parte en 1879

"...a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no habiendo conseguido hacer defecionar si no a los más débiles que eran unos cuantos".<sup>11562</sup>

Posteriormente, de las dos facciones políticas opositoras al Juarismo, Rochistas e Irigoyenistas o Bernardistas, los primeros eran los más beligerantes y los más inclinados a

considerar también la cuestión social, capitalizando para ello los rencores nacidos de una fractura socio-corporativa o etno-corporativa. En efecto, los Rochistas implementaron una estrategia de movilización, inclusión y cooptación de las Asociaciones de artesanos (herrereros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.). En Salta, dirigiéndose a Victorino de la Plaza, Martín G. Güemes, (a) "El Caballero de los Trapos Sucios", afirmaba que los Rochistas manipulaban poblaciones inescrupulosamente, apadrinando

"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia".<sup>11563</sup>

Y en Catamarca, en oportunidad de aceptarse en los pueblos de Andalgalá, Santa María y Tinogasta la matrícula impuesta por la Ley de Patentes, el Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa se constituyó desde su llegada a Andalgalá

"...en reclamante universal por mala clasificación: un día se ha presentado al Juzgado encabezando 15 o 20 artesanos entre herrereros, sastres, zapateros, albañiles o carpinteros, y una turba de 30 a 40 mujeres de la hez de este pueblo".<sup>11564</sup>

Figueroa reclamó por aquellos artesanos que carecían de taller, como fue el caso de los 'sastres', como que

"...no los comprendía la Ley porque estos no tenían sastrería pues no tenían mercaderías ni introducidas ni compradas en plaza y que a los sastres solamente no aplicaba patente? la Ley, reclamó por herrerías, por dos bastante formales que he matriculado, dejando dos más pobres sin patente".<sup>11565</sup>

También Figueroa incluyó a las mujeres en sus reivindicaciones al sostener que en Catamarca

"...no hay herrerías patentables, de carpinterías habló otro tanto y por fin llegó a las Panaderías pidiendo al Juez dé culto libre a las amasanderas y antes que el Juez lo hiciera él les dijo de su cuenta que vayan a amasar de lo que yo protesté haciéndolo responsable de lo que hacía".<sup>11566</sup>

Finalmente, en Jujuy, donde la fractura de origen corporativo también subsistía, la cuestión social tomaba carta de ciudadanía. Un llamado Club de Obreros, es decir una asociación de artesanos, al servicio del Diputado José María Álvarez Prado,<sup>11567</sup> heredero de la facción Barcenista, tomó entidad política, es decir fueron movilizadas políticamente. En el caso específico de Jujuy, el partido gubernista era en Diciembre de 1890 tan reducido, a juicio del ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el Gobernador

"...se ha visto obligado a erijir en entidad política a un Club de Obreros, elemento inconsciente de que dispone el Diputado [Álvarez] Prado, compuesto de la última clase social, la que incitada por el licor y por la impunidad, comete diariamente los desmanes que son consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a los que lo mueven".<sup>11568</sup>

La autonomía de las provincias, garantizada en la Constitución Nacional y en las Constituciones Provinciales --argumento central en que se basaba el régimen federal de gobierno y una de las causales de fractura genética-- se la bastardeaba cuando se la pretendía ampliar al extremo de convertirla en soberanía plena, exenta del control de constitucionalidad del gobierno federal. No obstante la primacía de la soberanía nacional por sobre las soberanías provinciales, a cada provincia le asistían derechos propios e indelegables, que la realidad del creciente proceso de centralización fue erosionando cada vez mas.<sup>11569</sup>

Haciendo referencia al derecho que le cabe al gobierno federal de intervenir las provincias, el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, en la sesión del Senado en que participaron Vélez Sársfield y Sarmiento, pero en una posición opuesta a ambos, se confesó partidario de la intervención a la provincia de Corrientes,<sup>11570</sup> sosteniendo que

"...siempre que el voto popular, que la soberanía del pueblo son abolidos [o violados], el derecho de intervención surge de la naturaleza misma de la forma [republicana] de gobierno".<sup>11571</sup>

#### Capítulo V-B-9: **Profesionalización del ejército y su gangrena en las intervenciones federales.**

##### **Índice**

- H-I Intervenciones Federales en Argentina como disuasivos de localismos provinciales.
- H-II. Tradición historiográfica en materia de desborde militar
- H-III Diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes).
- H-IV Invasiones de un poder en otro.
- H-V Rol del parentesco en el reclutamiento y selección de destinos y promociones.
- H-VI.- Vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales con las Intervenciones Federales.
- H-VII.- Elecciones provinciales e impacto de la frontera; la violencia comicial.
- H-VIII. Ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército.
- H-IX.- Indisciplina de las Guardias Nacionales, prácticas inhumanas.

#### **H-I Las Intervenciones Federales en Argentina como disuasivos de los localismos provinciales.**

Cabe preguntarse en materia militar si el Ejército y las Guardias Nacionales contaron siempre en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario se puede hallar en su desempeño histórico fuertes altibajos, fracturas, desajustes o involuciones; y si esta innovación del Ejército Nacional fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las élites o si, por el contrario, alimentó el conflicto entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de una modernidad

colonial-absolutista, aún inconclusa, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>11572</sup> La aparición de la república moderna hizo necesario contemplar entonces el rol de la milicia en las luchas políticas y parlamentarias.<sup>11573</sup> Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades militares. Es de preguntarse entonces qué estabilidad política podía sustentar a las provincias, si la heterogeneidad de sus elites hacía que las Comandancias Militares intervinieran los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de las Provincias.

En este trabajo analizamos el rol de la milicia como instrumento de formación y destrucción o fractura de hegemonías; la diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes), las invasiones de un poder en otro, la vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales con las Intervenciones Federales, las elecciones provinciales y la frontera; la violencia comicial; la ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército; la indisciplina de las Guardias Nacionales; las prácticas inhumanas; y el rol del parentesco en la selección de los destinos y las promociones.

Para estudiar estas variables, hemos aplicado la lectura indiciaria, de Ginzburg (1983, 1994); y el análisis intersticial o residual,<sup>11574</sup> del que nos habla Marcello Carmagnani, seleccionando numerosos textos de época hallados en la correspondencia presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, así como en la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.

## **H-II. Tradición historiográfica en materia de desborde militar**

Para Clausewitz, quien tuvo una gran influencia en los cuadros de oficiales del Cono Sur de América Latina, a través de sus seguidores Von der Goltz y Körner, la guerra era la continuación de la política por otros medios.<sup>11575</sup> En la última post-guerra, el Estructural-Funcionalismo, representado por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, sostuvo que la milicia, conjuntamente con las demás instituciones de la democracia liberal, proveía el necesario apoyo para el equilibrio del sistema. Para esta escuela de pensamiento, el impacto de la milicia en el pasado político de las repúblicas occidentales estaría ligado con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de los paradigmas castrenses de raigambre liberal, como los ejércitos de milicias provinciales o Guardias Nacionales versus los nacientes ejércitos profesionales de raigambre prusiana).<sup>11576</sup>

A juicio de Cantón (1965), la transformación del ejército de una estructura inicial provincial, romántica y guerrera en una profesional y centralizada comenzó con la fundación del Colegio Militar en tiempos de Sarmiento.<sup>11577</sup> Y para Nunn (1970-72) como para Trindade (1986), quienes analizan el comportamiento de la oficialidad de los diversos ejércitos, el funcionamiento de las elites puede comprenderse a través del comportamiento de la oficialidad. En la Argentina, las tesis de Roberts (1938) y Halperín Donghi (1979), remontan el origen de la nacionalidad argentina a la conciencia criolla que las Milicias adquirieron con el triunfo obtenido sobre los británicos en Buenos Aires a comienzos del siglo XIX.<sup>11578</sup> Y la tesis de Rouquié (1981) prolonga este origen a la conciencia adquirida

durante las guerras civiles y la guerra de la Triple Alianza. Pero este largo proceso no se habría incubado sin profundas contradicciones.

Los conflictos entre las Milicias y el Estado se habrían manifestado en las rivalidades generadas por el reconocimiento del mérito militar (ascensos, premios y destinos), las cuales reflejarían las contradicciones por la ocupación del aparato militar del naciente estado nacional.<sup>11579</sup> Finalmente, mientras autores como Auza (1971), Cantón (1971), Rafael (1982) y Caterina (1987) intentaron analizar la participación del Ejército en las intervenciones federales a las provincias, autores como Schiff (1972) y García Molina (1990, 1994 y 1995) se redujeron a analizar las influencias prusianas en la formación del ejército Argentino.<sup>11580</sup>

### **H-III La diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes).**

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>11581</sup> La aparición de los Ejércitos de Línea en la panoplia de la república moderna hizo necesario contemplar sus relaciones con la burocracia civil y eclesiástica y con las Milicias que las precedieron; así como su propia independencia de los otros poderes del Estado. En dichas relaciones, las diferencias entre las Guardias Nacionales y los Cuerpos de Línea, y las incompatibilidades militares ocupaban un lugar crucial.<sup>11582</sup>

El que los militares, como los Jefes de Frontera, ocuparen cargos políticos como el de gobernadores o legisladores, fue puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y juristas.<sup>11583</sup> Fundado en la intervención abusiva de los jefes del ejército en las cuestiones políticas provinciales, el periódico El Nacional acusaba en 1864 a las Comandancias Militares de "una amenaza verdadera" contra la Provincia y el Pueblo, que torna "ilusoria la libertad".<sup>11584</sup> El primer golpe militar acontecido después de Pavón fue padecido por Salta, "...contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado esplicitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial".<sup>11585</sup> En efecto, a juzgar por los descargos que luego produjera el Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley Wilde,<sup>11586</sup> debido a la agitación política que padecía su tropa, resolvió --de acuerdo con el Gobierno de Uruburu-- sacarla de la Provincia, entrando el 29 de Febrero a la Capital de Jujuy

"...con 147 hombres piquetes de la 1a., 2a., y 3a. Compañía, dejando por orden del Gral. Anselmo Rojo,<sup>11587</sup> cincuenta y más hombres de guarnición en Salta a las inmediatas [órdenes] del Cap. D. Napoleón Uruburu, de la confianza por supuesto del Gobierno".<sup>11588</sup>

Quince días más tarde, el 15 de marzo a las tres de la mañana, las tropas acantonadas en Jujuy, bajo la influencia de un aguacero semejante al diluvio, se sublevaron, y a juzgar por los dichos descargos de Wilde

"...me negó toda obediencia, diciendo que iba a echar a tierra al Gobierno de Salta de acuerdo con el pueblo; y dijo que lo haría de su propia autoridad, supuesto que yo no quería obedecer a su llamamiento. La intentona, el motín se consumó, y temeroso de un saqueo en la Capital [de Jujuy], consentí que dos oficiales los condujeran fuera de la población".<sup>11589</sup>

Como entre los sublevados se encontraban el Subteniente Alfredo Wilde,<sup>11590</sup> y el Teniente Fábregas, oficiales del Batallón 80. de Línea, Pepe Posse se preguntaba en *El Liberal*,

"...¿que significa este hecho? ¿creeremos que el hijo se amotinaba contra el padre?. Pero ya sabemos como pensaba el padre en las cuestiones políticas de Salta, y sabemos también que los sublevados querían por la acción lo mismo que su Jefe, luego no hay que hacer esfuerzos de malicia para atribuir el verdadero origen de aquel motín al más interesado en cuestión".<sup>11591</sup>

En el transcurso de la sublevación se cometieron barbaridades que fueron denunciadas por Pepe Posse desde las columnas de *El Liberal* de Tucumán, que luego se desmintieron, entre ellas "...la fusilación de nuestro decidido amigo, Cnel. Sergio Corvalán, la del Cap. Borelli y una compañía de estos", cometidas por los caudillos del Campo Santo: Alejandro Figueroa, Vicente Anzoátegui, Ramayo, etc.<sup>11592</sup> La montonera de Chicoana, levantada al mismo tiempo que la rebelión del Batallón 80. de Línea, comprobaba según Posse la naturaleza del enlace que tenía la revolución.<sup>11593</sup> Merced a la información proveída por el Gobernador de Jujuy Dr. Daniel Aráoz Tezanos Pintos, las fuerzas del Gobierno de Salta pudieron batir a las tropas del Batallón 80. de Línea en Los Sauces.<sup>11594</sup> La participación que había tomado el Gefe del Batallón 80. de Línea Coronel Guillermo Wilde,<sup>11595</sup>

"...en las cuestiones políticas internas de la provincia de Salta, faltando a la abstención que le correspondía observar, como Jefe Nacional en servicio activo, o más bien contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado explícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial contra las autoridades legalmente constituidas, que deben sostener lejos de combatir",<sup>11596</sup>

fue juzgada en causa militar, preñada de denuncias y testimonios contradictorios. Según los descargos del Coronel Wilde, expuestos en el Apéndice Sal-I, estos probarían que en realidad el Gral. Rojo manifestó desidia pues no estuvo a la altura de los acontecimientos.

Cuatro años después, en 1868 el Senador Nacional Nicasio Oroño, en representación de Santa Fé, propuso una ley "...prohibiendo al Poder Ejecutivo mantener fuerzas armadas en el interior de las provincias".<sup>11597</sup> Cinco años después, en 1873, el Diputado Onésimo Leguizamón reprochaba a la Cámara, que nunca hubiera mandado a San Luis ninguna Comisión o Diputación para que remediara sus males, pues

"...ha sido por largos años dominada por el Ejército de las fronteras, o más bien por sus jefes. ¡Siempre los Gobiernos haciendo los Diputados al Congreso y a la Legislatura de Provincia!".<sup>11598</sup>

Tres años más tarde, en 1876, en Santiago del Estero, el Cnel. Octavio Olascoaga,<sup>11599</sup> Comandante del 9 de Línea, había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",<sup>11600</sup> y había logrado --luego de la caída de los Taboada, con la derrota de Mitre en La Verde (1874)-- hacerse reputación de procónsul, o

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el gobierno provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente para sostener por falta de recursos y de prestigio".<sup>11601</sup>

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse "...la simpatía de las mujeres (única cosa que le envidio), que en Santiago gobiernan a los hombres, de manera que es allí el Dios Chiquito".<sup>11602</sup> Persuadido el Ministro de Gobierno José María Corbalán, que su candidatura a Gobernador era imposible, se había adherido a la candidatura del Cnel. Olascoaga, "...a quien muchos de nuestro partido lo proclaman como el único capaz de unir a todos y organizar esta provincia".<sup>11603</sup> En efecto, en 1876 el Cnel. Olascoaga, hacía política en el Norte por cuenta del Ministro de la Guerra Adolfo Alsina, principiando

"...por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para extender su influencia y su partido en el Norte, ayudado por sus antiguos amigos los Navarros y Molinas en Catamarca y sus flamantes amigos los Padilla en Tucumán".<sup>11604</sup>

El comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, como apoderado judicial de Manuel Taboada en dicha provincia,<sup>11605</sup> revelaba asimismo las intrigas y planes políticos del Ministro Alsina. Su política era

"...albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, para mantener en jaque al Gobierno de Santiago y hacer necesaria la permanencia de las fuerzas nacionales y de su agente Olascoaga allí".<sup>11606</sup>

También en Córdoba, el Diputado Nacional Gerónimo del Barco, quien ingenuamente creía que debían adoptarse incompatibilidades entre la milicia y el parlamento, al decir de Antonio del Viso

"...vino para realizar aquí la conciliación (!!!) y encaminar las cosas por la política parda, que es una Sra. de su familia y estirpe...ha tratado de hacer un bochinchito en la Legislatura, echando o pretendiendo echar a los Jefes y oficiales de Guardia Nacional que son Diputados o Senadores".<sup>11607</sup>

El mismo día en que principiaba la inscripción en el Registro Cívico, es decir en que supuestamente se iniciaba la movilización política de nuevos segmentos de la población,<sup>11608</sup> el Gobierno ordenaba, según el Diputado Nacional Gerónimo del Barco, "...la movilización y regimentación de la Guardia Nacional".<sup>11609</sup> Estos Guardias regimentados o movilizados "...se llevaban por compañías y por batallones a ser inscriptos, donde el Gobierno podía influir por medio de sus Gefes".<sup>11610</sup> Las elecciones de 1878 se hicieron en Córdoba

"...rodeando las mesas con la fuerza pública y registrando a los individuos que iban a votar, para ver qué boletas llevaban; y, si esa boleta no contenía la lista del gobierno, ese individuo iba preso".<sup>11611</sup>

En San Luis, en 1876, el Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. Julio A. Roca, quien en ese entonces era un ferviente admirador del Diputado Onésimo Leguizamón, le manifestaba al Diputado Nacional Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como el caso del Comandante Moreno, candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad que residen a solicitar puestos públicos".<sup>11612</sup> En Tucumán, en 1879, algunos Comandantes de Guardia Nacional "...que andaban haciendo uso de su influencia oficial para citar concurrentes a un club de oposición que va seguramente a la revolución", fueron destituidos.<sup>11613</sup> Y en La Rioja, en 1864, el Coronel Julio Campos fue también hecho Gobernador por el Batallón No.6 del

Ejército de Línea.<sup>11614</sup> Y quince años más tarde, en 1880, el Interventor Pedro Nolasco Arias,<sup>11615</sup> impuso como Senadores Nacionales, sin consultar con partido alguno, a Adolfo Dávila y a Nicolás Barros.<sup>11616</sup>

#### **H-IV Las invasiones de un poder en otro.**

Como consecuencia de estas impugnaciones e incompatibilidades, la Inspección General de Armas emitió en 1880 una Circular,<sup>11617</sup> al igual que lo hiciera el Ministerio de Instrucción Pública,<sup>11618</sup> y la Jefatura de Policía,<sup>11619</sup> que prohibía a los Jefes en servicio activo tomar parte en las cuestiones de la política interna y electoral de las Provincias. En los planes del Gobierno estaba presente una ley dictada en 1880 que prohibía la acumulación de empleos nacionales y la retención de cátedras sin servirlos por parte de los Legisladores nacionales. Sin embargo, en Entre Ríos, el General Juan Ayala,<sup>11620</sup> contrariando dicha Circular, se trasladó en 1881 al Departamento de La Paz, con el exclusivo objeto

"...de mover elementos electorales, sirviéndose del ascendiente que le da su posición de Intendente de la Nación, para favorecer el triunfo de un candidato que me suceda en el Gobierno".<sup>11621</sup>

La denuncia era sumamente grave por cuanto Ayala, envió Agentes a la campaña

"...para decir a los Oficiales de la Guardia Nacional, que nadie sino él como Intendente de la Nación tiene autoridad sobre la Guardia Nacional y que todos deben concurrir a su llamado el día que les indique, amenazando con el servicio en el Ejército de Línea a los que no cumplan sus instrucciones".<sup>11622</sup>

Entre los agentes enviados estaba el Comandante Félix Benavídez. El Gobernador José Francisco Antelo se vio en el caso de destituirlo si llegaba a comprobar "...una participación indebida en el acto electoral...porque no puedo permitir que los Jefes Políticos hagan política por su cuenta o por cuenta del Gral. Ayala".<sup>11623</sup>

En Catamarca, el Jefe de Enganche andaba a juicio de Francisco Caracciolo Figueroa "...encabezando serenatas y ejerciendo otros actos de presión en favor del gobierno".<sup>11624</sup> A Figueroa le aseguraban personas de respeto que el día de la manifestación el Jefe de Enganche "...ha vestido de soldados a personas extrañas al piquete de reclutas, aumentándolo de ese modo a 60 o 70 soldados".<sup>11625</sup> Y en Salta, el Senador Nacional Francisco J. Ortiz planteó en 1885 la incompatibilidad entre las funciones gubernativas de Juan Solá y las militares, que detentaba como Jefe de la Frontera del Chaco.<sup>11626</sup> Estas incompatibilidades dieron lugar a que con el tiempo el Regimiento se politizara y cayera en la mayor de las indisciplinas.<sup>11627</sup> Finalmente, el Gobierno destituyó al Cnel. Solá de la Jefatura de la Frontera de Salta nombrando en su lugar al Comandante Baldomero Lamela, pero al hacerlo Solá no entregó "...los 20.000 tiros, armas y pertrechos pertenecientes al Regimiento que manda Lamela y que él conserva indebidamente sirviéndose de ellos para los planes que abriga".<sup>11628</sup> Por último, si bien el art. 64 de la Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los militares, ser elegidos Diputados; las leyes orgánicas de la Marina y del Ejército limitaron a comienzos de siglo esa facultad constitucional.<sup>11629</sup>

## **H-V El rol del parentesco en el reclutamiento y la selección de los destinos y las promociones.**

En el interior argentino, en la segunda mitad del siglo pasado, la tradición historiográfica sostiene que la vinculación de la élite política y social con la milicia estaba personificada en algunos casos en ciertas y determinadas familias.<sup>11630</sup> El mecanismo inicial de reclutamiento de la oficialidad, legado histórico de la contra-reforma Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número de los reclutados a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba a los cuerpos de oficiales en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.<sup>11631</sup>

El matrimonio fué así para algunos oficiales un elemento coadyuvante en dicha carrera militar. En Salta, Manuel Alderete, al frente de una Oficina de Enganche, le pedía a Roca lo recomendará frente al Ministro Dr. Francisco Ortiz para concertar un compromiso matrimonial "...entrando en una distinguida familia: de la alta aristocracia [la de Ricardo Isasmendi y Doña Manuela Arias de Ortiz]".<sup>11632</sup> Sin embargo, es sabido que con la Organización Nacional mientras el reclutamiento de la oficialidad fue incrementándose progresivamente en beneficio de sectores populares y en perjuicio de las clases dominantes, el número de militares entre los miembros de la élite política, particularmente en el Congreso Nacional y en las Legislaturas, fue reduciéndose progresivamente en beneficio de ex-magistrados y abogados. La selección de los destinos para el cuerpo de oficiales muchas veces contemplaba una realidad donde prevalecían sólo las conveniencias personales y el parentesco. Para solicitar el puesto de Jefe de la Guarnición Sarmiento en sustitución del Gral. Eduardo Racedo, el Jefe de Guardias Nacionales Manuel Antonio Espinosa,<sup>11633</sup> tuvo en cuenta

"...la circunstancia especial de estar situada mi estancia en sus inmediaciones conciliando así mis deberes militares con la atención de mis intereses descuidados desde algunos años atrás".<sup>11634</sup>

En la mayor parte de los casos, en los pases, ascensos y destinos prevalecían las alianzas políticas y el parentesco. En algunos casos, el oportunismo vigente traía la sospecha de tratarse de un ejército mercenario más que de uno profesional. Desde Rosario, Carlos M. Maldonado le aseguraba a Rocha que el ex-Mayor del Ejército César Cella,<sup>11635</sup> era Juarista sólo porque esperaba la reposición en las filas del Ejército. Cella estaba resentido "...desde el sumario en que por salvar a Bedoya, él asumió la responsabilidad de los hechos, y lo colgaron sin consideración".<sup>11636</sup> Según Maldonado, una vez que obtenga la reposición, Cella romperá "...abiertamente con Juárez, porque su objeto, de rehabilitarse se habrá llenado, y servirá a Vd., si le proporciona desde ya, como sostenerse y su grado en el Ejército o mejorarlo cuando Vd. sea Presidente".<sup>11637</sup> Y con respecto al oficial Juan C. Rojas, éste le confesaba a Anacleto Espíndola que "...me mantengo con libertad para plegarme más tarde al que me convenga a mis intereses e iré con el que me saque de mis compromisos".<sup>11638</sup> Rojas le aseguraba a Espíndola que

"...tengo mi casa hipotecada y no me conviene meterme en política a tontas y ciegas, en los cinco años que sufrí últimamente de emigración estoy escarmentado y mis correligionarios nunca me han ayudado en nada así es que si Rocha me llama y me salva mis compromisos estaré con él".<sup>11639</sup>

Desde Salta, el Cnel. José María Uriburu,<sup>11640</sup> recordábale a Roca que no obstante que durante las elecciones de 1874, merced al Regimiento del 12 de Línea, se mantuvo el

orden en tres provincias "...no se nos da asensos, no se nos apoya de nueve meses a esta parte, ni se recuerda para nada de nuestros servicios en esas emergencias, ni en la frontera, donde los indios cada día perseguidos en el interior del desierto se ven en la imposibilidad de dar ningún malón".<sup>11641</sup>

Y desde Avipón,<sup>11642</sup> el mismo Cnel. Uriburu le insistía a Roca cinco años después que

"...hay una falange de individuos, sin mérito personal, que van haciendo carrera porque son primos, o hermanos, del Dr. tal; a Vd. a mi, y otros que habemos en el Ejército, no hemos echo valer la posición de nuestros padres, que nos han legado un nombre ilustre, para nuestros asensos, lo mucho y lo poco lo emos ganado palmo a palmo".<sup>11643</sup>

En Salta, el cargo más relevante del punto de vista militar era según Francisco J. Ortiz, el de Jefe de la Frontera, pues "...este es su Mesías, su salvador, del que lo esperan todo. Amenazan con los remingtons para la primera elección".<sup>11644</sup> A cargo de dicha responsabilidad estaba desde hacía tiempo el afamado Coronel Napoleón Uriburu.<sup>11645</sup> Uriburu tenía sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y "...sublevará más tarde los de Yrúya y Santa Victoria".<sup>11646</sup> Este hombre funesto, a juicio de Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición administrativa ni se puede cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y persigue, y destierra a los que son amigos del gobierno".<sup>11647</sup>

Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel Napoleón Uriburu obedecía, al parecer de Torino y Figueroa de Freytes (1982), a un plan más amplio aún gestado por el Presidente Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha.<sup>11648</sup> Pero la principal tabla de salvación

"...que aún les queda, y tal vez la única, es el Regimiento 12 de Línea y su Jefe Uriburu...[pues] de allí sacan hombres para hacer elecciones en los Departamentos fronterizos y diseminarlos como agentes en toda la provincia. De allí sacan armas para sus parciales y caballos para sus correrías sin gastar medio y sobre todo de allí sacan también dinero a montones a costa del erario nacional por que el Jefe es socio y correligionario y pariente de los proveedores que son Uriburus y por consiguiente se dan y se forman recibos y comprobantes sin cuenta ni razón".<sup>11649</sup>

Pero como la presencia del 12 de Línea se había hecho criminal, para el Diputado Nacional David Saravia era indispensable

"...reemplazarlo inmediatamente aunque solo sea de pronto con unos cien guardias nacionales, al mando de un buen Jefe, que lo tiene Vd. aquí, y un par de Capitanes que podría Vd. mandar de fuera".<sup>11650</sup>

## **H-VI.- La vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales con las Intervenciones Federales.**

La vinculación entre el Ejército y las Intervenciones Federales en las provincias del interior guardaba un recuerdo amargo.<sup>11651</sup> En Catamarca, la candidatura del Coronel José

Silvano Daza se la miró desde un principio, en 1885, como impuesta militarmente, pues a decir del Senador Nacional Manuel F. Rodríguez, en carta reservada dirigida al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, "...los gobiernos militares no son simpáticos a los pueblos".<sup>11652</sup> Con el nombramiento de Daza, todo el clero estaba alarmadísimo, porque al parecer los Figueroas y el Dr. Uladislao Castellanos le habían dicho al Vicario José Facundo Segura y al Prior del Convento de los Franciscanos "...que yo venía con instrucciones de perseguirlos y aún de prenderles fuego a los monasterios e iglesias".<sup>11653</sup> En su visita a la campaña, el Mayor Daza comprobó que el Dr. Rocha "...tiene sus agentes políticos en todos los Departamentos, están preparados con dinero para hacer sus trabajos [y] a varios los conozco".<sup>11654</sup> Por ello, el Gobernador Daza al cambiar los Comandantes, Comisarios y Receptores de campaña al verse obligado a optar entre los Figueroístas y los Castristas, ha "...alarmado a los Figueroístas, por cuanto sostienen que los nuevamente nombrados, responden a la fracción Castrista casi en su totalidad".<sup>11655</sup>

La milicia fue desde su creación instrumento de formación y destrucción de hegemonías políticas. En Jujuy, en épocas de la administración de Teófilo Sánchez de Bustamante, en 1873, "...se gritaba a todas horas y en todos los tonos condenando la presencia de algunos soldados del Ejército Nacional que transitoriamente se hallaban en esta Capital".<sup>11656</sup> Y casi una década más tarde, durante el gobierno de Don Plácido Sánchez de Bustamante, compuesto por las mismas personas que en el gobierno de Don Teófilo, el Senador Francisco J. Ortiz expresaba que en la mencionada provincia no había seguridad "...ni para la propiedad ni para la vida de sus adversarios políticos".<sup>11657</sup> Esta vez el culpable no era Napoleón Uriiburu sino otro Napoleón, el Teniente Napoleón Álvarez, a cuyo mando se encontraba una pequeña fuerza de línea.<sup>11658</sup> Tres años más tarde, el Diputado Provincial Víctor Quintana le confiaba a Victorino de la Plaza que antes de cerrarse la elección de 1884, se presentó

"...el Guarda de Reyes Andrés Samorano, hermano del Gobernador, a la cabeza de más de 50 hombres de Guardias Nacionales movilizados por E. Tello así como los Comisarios de Policía de esta capital, incluso el Capitán de la Nación D. Napoleón Álvarez, Jefe de la Guarnición de Línea".<sup>11659</sup>

Y un año después, mientras el ex-Gobernador y Diputado Nacional Soriano Albarado delataba que el Comisario Superior de Policía era a la vez el Jefe del Piquete de Línea,<sup>11660</sup> el ex-Senador Nacional Segundo Linares denunciaba que a los que habían firmado el acta Rochista y no eran empleados

"...se les tomaba de sus casas y se les despachaba en un contingente, destinados por el Gobierno al Ejército Nacional".<sup>11661</sup>

Los seis individuos destinados por el Gobernador Álvarez Prado al Ejército de Línea "...sin más delito que haber firmado el Acta de proclamación de la candidatura de Vd.", lo indujeron a Linares a dirigirse a Tucumán para pedir su soltura al Juez Federal Benigno Vallejo.<sup>11662</sup> Y a los pocos meses, Pío Uriiburu le informaba a Rocha que en Perico de San Antonio "...nos derrotaron a balazos con fuerza de línea, matándonos tres hombres e hiriendo a varios".<sup>11663</sup> En el Chaco Santafesino, en la 2a. Línea de frontera, el Gobernador Simón de Iriondo denunciaba el estado de corrupción y los robos escandalosos que las Milicias "...hacen a la nación, especialmente en la Proveeduría de indios".<sup>11664</sup> El Regimiento 12 de Línea, ubicado en Neuquén, pero procedente de Salta, estaba compuesto según el Gobernador José Miguel Segura, casi en su totalidad de destinados (casi siempre

criminales), los que intentaron sublevarse en 1881.<sup>11665</sup> Con ese motivo, el Diputado Nacional Joaquín Villanueva lo prevenía a Roca que

"...hay aquí personas altamente colocadas que se empeñan en aser una lamentable atmósfera a nuestro amigo por los lamentables sucesos que han tenido lugar en la frontera a su cargo, sucesos que no son estraños si se tiene presente, los malos elementos de que se formó y compone, el Batallón 12 de Línea".<sup>11666</sup>

A propósito del sumario sustanciado, su Jefe el Gral. Rufino Ortega encontró el Fuerte de la Cuarta División "...hecho un infierno de chismes".<sup>11667</sup> Los Coroneles Benjamín Moritán,<sup>11668</sup> y Marcial Nadal,<sup>11669</sup> secundados por una culpable condescendencia del Fiscal, hicieron

"...cuanto han podido por formar cargos y acusaciones, transformando un proceso instruido a individuos de tropa por el crimen de sedición, en proceso contra los jefes de esos mismos soldados, por actos posteriores a aquel hecho".<sup>11670</sup>

En Santiago del Estero, cuando el Cnel. Aureliano Cuenca dejó la Intervención en 1882, el Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo le confiaba a Roca que las armas que tiene a su cargo no convenía dejarlas a su sucesor y que debían "...depositarse en el parque de la Provincia".<sup>11671</sup> Y en Entre Ríos, en 1882, los Jefes de la Guardia Nacional y hasta los más insignificantes oficiales incurrían en usurpación de títulos y honores, pues a juzgar por las denuncias del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, las insignias del Ejército de la Nación eran llevadas por "...hombres que aprovechan del prestigio que ellas dan para influir en el ánimo de las masas en favor de tal o cual bando local".<sup>11672</sup> Y en 1883, con motivo de tratarse la cuestión capital entre quienes pretendían la sede en Paraná y quienes deseaban que permaneciera en Concepción del Uruguay,<sup>11673</sup> el Gobernador General Eduardo Racedo, era acusado de rodearse

"...de gente non sancta traída de los Departamentos so pretesto de cuidar su persona. Tiene guardia de esos individuos a las ordenes del Comandante Díaz, traído ad hoc, y un oficial, hijo de este".<sup>11674</sup>

El pueblo de Concepción del Uruguay,<sup>11675</sup> a juicio del ex-Ministro de López Jordán, y amigo y condiscípulo de Roca, Juan Antonio Mantero,<sup>11676</sup> está

"...temeroso de estos aprestos bélicos que no encuentra como justificar o disculpar porque está fuera de las atribuciones de gobernante y este no puede hacerlo sino con algún propósito dañino".<sup>11677</sup>

No era para menos el temor, dado que Racedo trajo primero

"...cuarenta hombres y todos creímos que fuese exceso de presencia en un General acostumbrado a los combates pero siguen llegando en grupos de a cuatro y de a cinco, ya hay más de ochenta, y entre ellos asesinos alevosos, reconocidos que tienen un salvoconducto expedido por el Gobierno para que no puedan ser aprehendidos por vagos y criminales".<sup>11678</sup>

## **H-VII.- Las elecciones provinciales y la frontera; la violencia comicial.**

Las intervenciones de los Piquetes de Línea siempre estuvieron íntimamente vinculadas con las elecciones provinciales y nacionales convocadas periódicamente por los gobiernos. El Diputado Nacional Guillermo Rawson contaba en la Cámara en 1873 que al preguntarle a un joven la verdad sobre ciertas elecciones de provincia, aquél le contestó con el mayor candor:

"...Son excelentes elecciones, señor, no tenga cuidado: yo se lo puedo decir, porque yo soy Gefe de Policía allá, porque yo soy Gefe de un Regimiento Nacional que hay en aquella Provincia; porque yo soy Comandante General de Armas de la misma, porque yo soy Presidente del Club Electoral del que ha nacido el candidato; y, finalmente porque yo soy miembro de la Legislatura que ha informado a la Honorable Cámara del resultado de la elección".<sup>11679</sup>

La movilización de los Guardias Nacionales durante eventos electorales fue duramente cuestionada desde un comienzo. En Chilecito, La Rioja, con motivo de las elecciones de 1874, el Diputado José Benjamín de la Vega denunciaba que el Comandante de la Guardia Nacional movilizó sus fuerzas, y "...donde hay movilización de fuerzas, donde se largan para que vayan a votar, para tocarles la llamada a la tarde", el Diputado de la Vega decía "...que la elección no se ha hecho legalmente".<sup>11680</sup> Veinte años después, al denunciarse que en Chilecito un oficial del ejército hizo votar a los enganchados, la Comisión Investigadora recurrió "...a las listas del Ministerio de la Guerra, para ver si los nombres de los aludidos enganchados figuran en el registro electoral de Chilecito".<sup>11681</sup> Y en 1882, debatiéndose en la Cámara de Diputados de la Nación la reforma de la Ley Electoral, el Diputado Isidoro Ruiz Moreno cuestionó la presencia de fuerzas en el lugar del comicio.<sup>11682</sup> Y fue el Diputado Balsa quien contestó

"...que no era posible obligar a los gobiernos a retirar de sus acantonamientos a las tropas y a las policías, porque no era necesario que estuviesen alejadas de una ciudad, que era necesario simplemente evitar que esa fuerza tomara participación en la elección".<sup>11683</sup>

A lo que el Diputado Delfín Gallo formuló una moción de transacción que decía "...que las fuerzas serían rigurosamente acuarteladas el día de la elección".<sup>11684</sup>

Sin embargo, los principios de jurisprudencia electoral fueron completamente conculcados. En Córdoba, en tiempos del Gobernador Antonio Del Viso, y en oportunidad de celebrarse elecciones, como el oficialismo no se preocupaba de confeccionar listas, en opinión de Juárez Celman "...no será extraño que intenten otra cosa y no les queda absolutamente más camino que el soborno de la tropa con dinero".<sup>11685</sup> En Corrientes, la Intervención del Dr. Victorino de la Plaza, y la orden para la reposición de las autoridades de campaña, desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo exclamar al Juez Federal José Benjamín Romero,<sup>11686</sup> en carta a Dardo Rocha, que si bien "...los Jueces de Paz fueron repuestos, los Comandantes Militares de Campaña no; y tampoco los Jefes Políticos".<sup>11687</sup> Y donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz, el Interventor, a juicio de Romero, se ha atribuido "...la facultad de crearlos".<sup>11688</sup> También cuidó el Interventor de

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".<sup>11689</sup>

Entre los Comandantes que no fueron repuestos por el Gobierno nacional figuraban muchos que aún se hallaban exilados en Entre Ríos y el Uruguay. Los Coroneles Reyna, Araujo, Martínez,<sup>11690</sup> Romero,<sup>11691</sup> y Eustoquio Acuña,<sup>11692</sup> que respondían al afamado Coronel Santiago Baibiene, eran

"...enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen contingente si V. logra atraparlo, pues a la par de estos irá una infinidad de jefes de menos graduación y oficiales que mucho valen".<sup>11693</sup>

En Entre Ríos, los piquetes del Ejército de Línea establecidos en La Paz y Paraná, que el Gobernador Coronel José Francisco Antelo,<sup>11694</sup> solicitaba que se retiraran,

"...no tienen por el momento objeto práctico alguno ni responden a ninguna necesidad, tanto en el orden nacional como en el provincial, sólo sirven como una base a los propósitos electorales de los Jefes que los mandan y como una amenaza a los ciudadanos que no se inclinan y doblegan ante las pretensiones de esos mismos Jefes".<sup>11695</sup>

Y un año más tarde, en 1882, el Diputado Nacional Estanislao Zeballos revelaba a la Cámara todo el poder con que contaba la lista oficial.<sup>11696</sup>

En Catamarca, en oportunidad de las elecciones del 24 de Febrero de 1884, en que se presentó como candidato primero el Gral. Octaviano Navarro, luego un hijo suyo, y más luego el Jefe del Enganche, este último hizo manifestaciones públicas de hostilidad.<sup>11697</sup> Asimismo trajo cien hombres de La Rioja, merced al favor del Ministro Salvador de la Colina, y en el acto eleccionario el piquete y los enganchados "...arrimaban un fusil a la pared, les cambiaban el quepi por un sombrero de cualquiera de los concurrentes y los hacían sufragar".<sup>11698</sup> Como no bastó esto para el triunfo, la Mesa Electoral "...les hizo votar dos, tres y hasta cuatro veces a los mismos enganchados del piquete".<sup>11699</sup> Al año siguiente, desde Andalgalá, Benigno Palacios telegrafaba al Gobernador de Catamarca denunciando que "...el Capitán Ruiz más oficiales militares y tenientes Policía, reúnen sufragantes con situación amenazas contingente, obligan firmar Botaciones dicen harán a Remington".<sup>11700</sup> Desde La Rioja, con motivo de las elecciones celebradas el 29 de Marzo de 1885, Guillermo San Román le informa a Rocha que lo que ha sucedido "...es el acto más brutal de fuerza producido hasta hoy y de propósitos más perversos".<sup>11701</sup> Y desde Santa Fé, en 1884, José R. Espíndola denunciaba que los Comandantes de Armas "...arrean, castigan, hieren, llevan a la cárcel a los que no obedecen de ir con ellos".<sup>11702</sup> Y el ex-Gobernador Camilo Aldao, le expresaba a Roca que

"...nuestros paisanos necesitan hechos prácticos y hasta ahora no ven sino a los batallones organizados, con el uniforme nacional, y otros formándose contra nuestras leyes".<sup>11703</sup>

En oportunidad de las elecciones presidenciales en que se eligió a Juárez Celman, el clima pre-electoral estuvo teñido de violencia. En Cuyo, el rol de las tropas de línea y de la policía fué nefasto.<sup>11704</sup> En San Juan, donde el resultado fue desfavorable al Rochismo

"...las numerosas prisiones de parte de los agentes de policía en la ciudad y de los Subdelegados en los Departamentos, con el determinado objeto de menoscabar las fuerzas populares que no obedecían a sus caprichos, no han sido suficiente poderosas para dominarla e impedir que concurramos a las urnas".<sup>11705</sup>

En San Luis, las Comandancias no eran, a juicio de Simeón Lucero, mas que "...Agencias Electorales donde se alista a todo bicho viviente en las filas del candidato Cordobés",<sup>11706</sup> y las Mesas receptoras de votos eran apoyadas por fuertes piquetes de infantería, que

"...hacían votar su gente, [y] mientras les renovaban las boletas permitían a unos pocos de los contrarios que votasen u cambiaban impunemente los votos haciéndose sordos a cualesquier reclamo que se les hiciere".<sup>11707</sup>

Y en Mendoza, en Abril de 1885, Roca había traído ocho piezas de artillería para el Cuerpo de Serenos con que según J. Echevarrieta "...quieren militarizarnos del todo la Provincia, pues así conseguirán dominar a todo el bajo pueblo i cuartar (sic) las libertades públicas".<sup>11708</sup>

Por último, en Santa Fé, mientras Pedro Marisano le aseguraba al político Rochista Mariano Cabal,<sup>11709</sup> que con la adquisición de los Comandantes Mateo Coria,<sup>11710</sup> Evangelista Lobos y Uladislao Acosta,<sup>11711</sup> "...y unos cuantos oficiales prestigiosos que lo seguirían creo haber puesto una pica en Flandes";<sup>11712</sup> el situacionismo u oficialismo constituido por las familias de Iturraspe y Paredes acordaron reemplazar al Cnel. Silverio Córdoba,<sup>11713</sup> con el Cnel. Matías Barrera, "...con el objeto de hacerlo cargo de la Guardia Nacional de los Departamentos Rosario, San Lorenzo y General López".<sup>11714</sup> Un año más tarde, en 1885, Estanislao Zeballos le adelantaba a Roca que los Coroneles Gaitán, Matías Olmedo y Almendra, y los Comandantes Pérez y Fernández "...firmaron un compromiso aceptando mi candidatura, con el cual se han comprometido a venir por lo menos 900 hombres".<sup>11715</sup> Fracasada la candidatura de Zeballos, las elecciones Provinciales se hicieron en Rosario, en 1886, a juicio de Camilo Aldao, "...como en tiempos de Iriondo, con el nuevo escándalo innecesario de venir a botar [sic] con la música del piquete disfrazada de paisano".<sup>11716</sup> Y en Rosario y la campaña, José Cabot le adelantaba a Rocha que las elecciones "...serán reñidas y hasta puedo decir sangrientas".<sup>11717</sup> Para el 12 de Abril, fecha de las elecciones, el Rochista José Cabot se comprometió a conducir, desapercibidamente y a su propia costa, grupos de gente "...por los vapores, otros por el ferrocarril y el resto a caballo, subiendo el Arroyo del Medio".<sup>11718</sup> Entre quienes más esfuerzos desplegaron figuraban el S. M. Simeón Baez,<sup>11719</sup> y "...por su influencia los Mayores Olegario y Gabino Gallegos con su jente, el Comandante Bazán con la suya, los Capitanes Bustamante y Gutiérrez con otros grupos, y muchos jefes del Carcarañá, Villa Casilda y San Lorenzo".<sup>11720</sup> Mientras el partido Rochista no daba señales aparentes de vida, el Juarismo "...reúne jente desde ahora y comprometido a triunfar a todo trance, la halaga, la arma y quizá la lance a la provocación y al desorden".<sup>11721</sup>

## **H-VIII.- La ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército.**

La ubicación de los Cuerpos del Ejército de Línea en las regiones de frontera era una aspiración permanente de aquellas provincias que carecían de recursos propios. Desde Santiago del Estero, el Gobernador Dámaso E. Palacio le transmitía a Roca el interés por lograr que el 5o. Cuerpo permaneciera en Santiago "...no sólo por motivos de seguridad y orden, sino también por economía".<sup>11722</sup> Y desde San Luis, el Gobernador Jacinto Videla le expresaba a Roca que

"...la estadía aquí de un cuerpo de línea nos proporcionaría la oportunidad de economizar unos 40 o 50 vigilantes, que con sus sueldo, rancho y vestuario es ya algo para los pobres como nosotros".<sup>11723</sup>

Videla le rogaba a Roca, que el Cuerpo "...sea de infantería, primero porque con su banda alegra al pueblo, y segundo tiene más facilidad para alojarse mejor, sin pensar en forraje de caballadas que aquí es escaso y caro".<sup>11724</sup>

En cuanto a los denominados destinados en los Cuerpos de Línea, en Mendoza, el Gob. Joaquín Villanueva le relataba a Roca, con referencia a los hombres que los defienden,

"...hay treinta hombres mas destinados fuera de los que han sentenciado los Tribunales y tengo nueve presentaciones y treinta empeños para que no sean incorporados a las Compañías. Hasta hoy las solicitudes son hechas ante el Gobierno pero mañana no faltará un Chileno González que patrocine a las madres, mujeres o hermanas de los destinados y vayan ante el Juez Federal a fastidiarlo como a mí".<sup>11725</sup>

En San Luis, con motivo de la movilización de los cuerpos militares, el Gobernador Toribio Mendoza llevó su prudencia con el Juez Federal Donaciano del Campillo hasta el extremo de

"...hacer respetar por los Jefes de los Cuerpos, varias ordenes que directamente les pasaba el Juez, mandándoles dieran de baja algunos individuos por haberlos exceptuado".<sup>11726</sup>

El Gobernador de Entre Ríos Coronel José Francisco Antelo recomendaba a los Jefes de Cuerpo la conveniencia de que a los destinados "...no les den puerta franca, y por el contrario los tengan bien apretaditos, porque se les han de desertar aunque sea a pié".<sup>11727</sup>

El Enganche como sistema se había generalizado en todo el interior.<sup>11728</sup> Pero cuando las excepciones al Enganche no eran aceptadas por los Tribunales, el antiguo sistema del pago de personería seguía teniendo vigencia.<sup>11729</sup> En las postrimerías de la Guerra del Paraguay, en el Rosario, Miguel Sánchez de Bustamante le confesaba al Coronel Patricio Rodríguez,<sup>11730</sup> que "...yo no tengo a mal que cualesquier soldado pague personería cuando su Jefe lo precisa como yo mismo les he adelantado dinero para que lo hagan".<sup>11731</sup> Y aún en la década del 80, Rodríguez Molas (1982) descubre que, a pesar de establecerse un riguroso sorteo en el reclutamiento de los ejércitos, se contemplaba la posibilidad de la sustitución mediante personeros.<sup>11732</sup>

## **H-IX.- La indisciplina de las Guardias Nacionales; las prácticas inhumanas.**

En la Milicia, a pesar de haber transcurrido largos años desde la Revolución de Independencia y la caída de Rosas, las prácticas inhumanas no quedaron definitivamente abolidas. El propio Mitre relata en su Historia de San Martín que el Libertador, en oportunidad del proceso marcial instruido al Coronel español Antonio Landívar, con motivo de la ejecución de 54 prisioneros de guerra ---cuyas cabezas y brazos habían sido cortados y clavados en las columnas miliarias de los caminos por ordenes escritas del Brigadier Goyeneche-- firmó su sentencia de muerte el 15 de Enero de 1813.<sup>11733</sup> Y en ocasión de discutirse en la Legislatura Bonaerense el mecanismo para el reclutamiento de

los soldados destinados a la formación de las Milicias provinciales, a principios de 1822, el Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia rebatió el criterio de que se debían alistar primero a los "vagos y mal entretenidos", pues de ese modo "...no se hacía más que manchar la ley, produciendo una desmoralización pública".<sup>11734</sup> El ejército, según Rivadavia, "...no debía ser formado por hombres cuya norma de conducta fuera el servilismo, ni tuvieran más estímulo que el temor".<sup>11735</sup> Rivadavia añadía, que para incrementar las virtudes ciudadanas en los hombres de armas,

"...era indispensable proporcionar los estímulos capaces de crear ese honor deseado y eliminar todo aquello que había producido su degradación durante gobiernos opresores. Debíase bregar por inculcar un sentido ético y el honor que significaba defender la Patria".<sup>11736</sup>

Medio siglo más tarde, en Tucumán, cuando el Jefe del Enganche y el Intendente de Policía pretendieron detener en Santiago del Estero al Mayor Torena, Jefe del Piquete comandado por Napoleón Uriburu, aquél se resistió, "...pues en estas provincias los asesinos por ser Jefes de Línea no obedecen a la autoridad local, y la policía no puede ni arrestarlos".<sup>11737</sup> Y en Corrientes, al decir del Cnel. Rafael Erasmo Bosch,<sup>11738</sup> en el cuartel del Batallón formado por el gobierno, bajo el mando directo del Comandante General de Armas Coronel José Toledo,<sup>11739</sup>

"...se viola la ley, el hogar, el honor, y se azota y se martiriza con tormentos que la Inquisición no inventó, muriendo los ciudadanos en medio de los más crueles y horrorosos sufrimientos".<sup>11740</sup>

En dicho cuartel,

"...no se oyen de día y de noche mas que los lamentos y los ayes que arranca el dolor. Se estaquea, se pone en cepo Colombiano y se cuelgan los hombres de las muñecas sin que toquen en el suelo por las faltas más leves, y mueren muchos, sin la más insignificante fórmula de sumarios".<sup>11741</sup>

El cepo colombiano era el castigo más usual aún avanzado el proceso de Organización Nacional.<sup>11742</sup> El extremo de crueldad era llevado a cabo con mujeres. Cuando un recluta desertaba, se tomaba a sus esposas o concubinas como rehenes. Según el Diputado Nacional José Benjamín Romero, el rumor general designaba este hecho

"...como consumado en el cuartel de la Batería entre las sombras de la noche, a cuyo punto se llevan mujeres presas, aunque sea con niños de pecho, por orden del Inspector de Milicias, para castigar en ellas el delito de deserción del Batallón llamado Seguridad".<sup>11743</sup>

De orden del propio Inspector Coronel Toledo, los soldados del Batallón Seguridad "...llevan a la cintura la bayoneta aunque no estén de servicio".<sup>11744</sup> Esta práctica hacía recordar al pueblo Correntino, a juicio de Romero,

"...los días luctuosos de la invasión paraguaya, cuyos soldados recorrían nuestras calles llevando esta arma como ostentación de fuerza para aterrorizar al pueblo cautivo".<sup>11745</sup>

La indisciplina y la confusión de funciones en que estaban incursas las Guardias Nacionales eran el más claro testimonio de la ausencia de una necesaria modernización en los institutos armados.<sup>11746</sup> En Entre Ríos, la Guardia Nacional de cada distrito era declarada en estado de asamblea con el objeto que los ciudadanos presten por turno el servicio de la policía local.<sup>11747</sup> A esta confusión de funciones, el Diputado Nacional Estanislao Zeballos replicaba que "...la Guardia Nacional no puede prestar en ningún país el servicio de policía, sin deprimir la institución; diré más sin degradar la institución".<sup>11748</sup> En toda la provincia de Catamarca, Francisco C. Figueroa le confiaba a Roca

"...no hay un hombre capaz de disciplinar la Guardia Nacional porque los viejos soldados han muerto y así es que los ejercicios doctrinales a que se la somete desde dos años a esta parte no dan resultado alguno".<sup>11749</sup>

Para la organización definitiva del Ejército se contempló entonces la necesidad de crear en Palermo cátedras específicas. Ante la carencia de administradores, puesto que la república hasta ahora "...solo se ha propuesto crear Doctores",<sup>11750</sup> el Profesor Juan Biale Massé,<sup>11751</sup> en un muy ilustrativo documento, no encontraba otra solución

"...que organizar el Cuerpo administrativo del ejército con los Jefes y Oficiales que hay en él dedicados a las Comisarías de Guerra, pagadurías, Detall, etc.; y que tienen aunque no sea más que de un modo práctico conocimientos de contabilidad".<sup>11752</sup>

Una vez organizado el Cuerpo, Biale recomendaba que

"...las vacantes que fueren ocurriendo se llenarían con oficiales educados ad hoc en Palermo, donde no habría necesidad de crear sino las cátedras de administración militar, derecho administrativo, contabilidad general y de los servicios militares e instituciones de hacienda de la República Argentina".<sup>11753</sup>

No obstante los intentos frustrados de Biale, en vísperas de la Revolución del 90 el Ejército se hallaba extremadamente anarquizado.<sup>11754</sup> Desde Córdoba, el Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez le refiere a Roca, que según le ha manifestado el Mayor Pedro Toscano,<sup>11755</sup> el modo como en Buenos Aires hacen ahora sus reuniones los revolucionarios es dando bailes o tertulias caseras, a donde acuden muchos Jefes y oficiales, y en sus piezas interiores "...tienen sus conciliábulos los afiliados a las ideas revolucionarias, disimulando ante la policía la entrada a la casa".<sup>11756</sup>

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes militares del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

## Índice

- I-I Tradición historiográfica en materia de manipulaciones de la banca
- I-II Diferenciación de funciones del estado moderno.
- I-III Mecanismo de elección de los gerentes.
- I-IV Programación de cobros, plazos y renovaciones.
- I-V Instrumentación de la Banca para el favoritismo y la discriminación política.
- I-VI Quiebra de la banca privada.

## Introducción del capítulo V-B-10

En materia financiera cabe preguntarse si esta innovación de la banca fue asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de una modernidad colonial-absolutista, aún inconclusa, y reproducir las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>11757</sup> La aparición de la república moderna hizo necesario contemplar entonces la influencia de la banca en las luchas periodísticas, electorales, judiciales y parlamentarias.<sup>11758</sup> Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades bancarias.

En este trabajo no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de las Memorias bancarias, sino que nos hemos impuesto el análisis de:

- a) el rol de las gerencias de los bancos oficiales como agentes de formación y destrucción de hegemonías políticas (e.g.: soborno del periodismo);
- b) la diferenciación de funciones del estado moderno;
- c) el mecanismo de elección de los gerentes;
- d) la programación de cobros, plazos y renovaciones;
- e) la quiebra de la banca privada;
- f) su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política;
- y g) su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno;

Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,<sup>11759</sup> del que nos habla Marcello Carmagnani, seleccionando numerosos textos de época hallados en la correspondencia presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y la provincial del Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.

## I-I Tradición historiográfica en materia de manipulaciones de la banca

En la Argentina, autores como Gallo (1972), Páez de la Torre (1988), Bragoni (1993) y Converso (1993) encararon el estudio de la banca de las provincias en su relación con la metrópoli porteña. Por otro lado, autores como Jones (1983), Marichal (1984) y

Regalsky (1987) tomaron en cuenta las vinculaciones de la banca extranjera con la nacional.<sup>11760</sup> Pero ninguno de estos autores tuvo en cuenta las relaciones propiamente políticas (desviaciones, desajustes) entre la banca y las autoridades políticas nacionales y provinciales,<sup>11761</sup> ni la íntima conexión que se dio en ese entonces entre los regímenes bancarios y la naturaleza de los regímenes electorales, judiciales, educativos y comunicacionales (periodismo y telegrafía).<sup>11762</sup>

## **I-II La diferenciación de funciones del estado moderno.**

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>11763</sup> La aparición de los Bancos oficiales en la panoplia de la república moderna hizo necesario contemplar sus relaciones con los otros fragmentos de la burocracia civil; la influencia de los gerentes de bancos en el periodismo político y su influencia en la lucha parlamentaria.<sup>11764</sup> En dicho esquema, las incompatibilidades bancarias ocupaban un lugar crucial. Los gerentes que paralelamente detentaban un cargo público (ya sea en un Colegio Nacional, en la Justicia, o en el Correo), eran los más expuestos a la extorsión practicada por los poderes públicos.

La extorsión generalizada, vigente entonces en las prácticas bancarias, e íntimamente ligada a los intereses políticos, tal como lo denunciara Aristóbulo del Valle,<sup>11765</sup> hizo que a poco de producida la Revolución del 90, el Presidente del Banco de la Provincia Carlos Casares dictara una resolución --semejante a las vigentes cuando la refundación del Banco en la década del cincuenta,<sup>11766</sup> y a las Circulares que habían emitido diez años antes, la Inspección General de Armas y el Ministerio de Instrucción Pública-- prohibiendo

"...a los Gerentes mezclarse en asuntos políticos y desempeñar puestos públicos provinciales, debiendo optar por estos o la Gerencia, por juzgarlos incompatibles".<sup>11767</sup>

Sin embargo, dos años después, en el saqueo del Banco Provincial de Catamarca "...estaban complicados los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales".<sup>11768</sup> En Salta, el ex-Diputado Nacional y entonces Gerente del Banco Nacional Francisco J. Ortiz le pide en 1878 al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que interceda para que no le acepten su renuncia a dicha gerencia

"...y si la aceptan que nombren por lo menos una persona que no sea de la familia Uriburu porque si nombran uno de estos se llevará la trampa (sic) los fondos del Banco".<sup>11769</sup>

Casi dos años más tarde, en 1879, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz le confiesa a Plaza que "...la gerencia del banco en manos de Ortiz nos ha vencido".<sup>11770</sup> Compuesta la Legislatura en su mayor parte de comerciantes y hombres de escasa posición,

"...parece estaban con obligaciones contraídas en el banco y naturalmente, cuando se hace un arma política de esta clase de establecimiento es poderosa como Vd. muy bien lo comprenderá".<sup>11771</sup>

### **I-III El mecanismo de elección de los gerentes.**

A fines de 1879 el Diputado Marcos Figueroa le pasa a Victorino de la Plaza una factura aún más gravosa al aspirar para él la vacante del puesto de Gerente de la sucursal salteña del Banco Nacional. Con ese motivo le confiesa

"...cuanto vale este puesto para servir a los amigos, y no está muy lejos el tiempo en que nos han hecho valer esa posición para derrotarnos, en fin, esta última parte es reservada para Vd.".<sup>11772</sup>

Doce años después, en 1892, el Gerente del Banco Nacional y futuro Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro le advierte a Roca que

"...dejar el Banco es esponerse a que caiga en poder de un Modernista, pues [Carlos] Casares, como Vd. Sabe, está en esa corriente y al ofrecerme la Diputación lo que querían era alejarme y quitarse de encima mi influencia".<sup>11773</sup>

En Tucumán, a juicio del ex-Senador Provincial por Córdoba y futuro Senador Nacional José Vicente de Olmos, los Padilla no se han satisfecho con que el Gobernador Próspero García los dejara elegir como Síndico del Banco Provincial "...a quien quisieren", ni con que se les acordara "...repetidos plazos para el pago de sumas hasta insignificantes, por Contribución Directa y Patentes", ni con que el Gobierno evitara "...que el Banco les cobre hasta ahora sus deudas".<sup>11774</sup>

En San Juan, la participación de los Nacionalistas Mitristas en el gobierno de la provincia se ha de medir, según estimaba el Gobernador Carlos Doncel, en "...el Banco de la Provincia según el ruido que hagan".<sup>11775</sup> Los billetes del Banco de la Provincia

"...se reparte entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por mis amigos pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han asignado y [se] abandonarán el encanto comprador".<sup>11776</sup>

En 1885, el Sr. Ortiz, a causa de "...su actitud política manifiestamente contraria a los fines del gobierno", había recibido "...insinuaciones que son una amenaza a su crédito en el Banco Nacional".<sup>11777</sup> Y en 1888, el ex-Gobernador Rosauro Doncel cambia de resolución "...por ceder al empeño de algunos amigos que insisten en que me presente como candidato a la Gerencia del Banco Nacional en esta".<sup>11778</sup> Dicha Gerencia, según esos mismos amigos,

"...reclama una modificación en su personal dirigente en provecho del mismo Banco; y como para solicitar ese puesto es indispensable emplear influencias poderosas, yo le ruego a Vd. tenga la amabilidad de emplear la suya en mi favor si en ello no encuentra Vd. observación que hacer".<sup>11779</sup>

En Entre Ríos, los pocos dineros que habían quedado en el Banco Provincial, eran destinados en 1896, según Benito E. Pérez [Colman], "...a satisfacer las comodidades y la molicie de unos cuantos favoritos [del primer magistrado Salvador Maciá]".<sup>11780</sup>

En Córdoba, en 1885, Benjamín Castellanos le transmitía a Dardo Rocha que los compromisos que muchos de sus correligionarios tenían con el Banco Nacional "...les impide hacer manifestaciones de adhesión a favor de su candidatura, porque inmediatamente les cerrarán sus créditos y les exigirán el pago íntegro de ellos".<sup>11781</sup> Para proteger a sus correligionarios, "...hostilizados en sus intereses por la situación de Córdoba", Ramón F. Moreno propuso establecer en Córdoba un Agente del Banco de la Provincia de Buenos Aires "...que no teniendo ostensiblemente el valor de una Sucursal sea tal con carácter privado y mediante un contrato, cuyos términos quedan a fijar".<sup>11782</sup> Y cinco años después, en septiembre de 1890, frente a la negativa de los Cívicos en aceptar cargos públicos, el ex-Ministro de Gobierno Felipe Díaz le escribe a Roca para notificarle que a los principales miembros de la Unión Cívica que vinieron a pedirle que no aceptara el puesto de Director del Banco Provincial, les manifestó:

"...a mi juicio han debido y debían proceder por aceptar los puestos que el Gobierno les ofrecía, que esa era la manera de ir ascendiendo por grados hasta llegar a apoderarse de la situación de Córdoba".<sup>11783</sup>

Esa actitud de rechazo, es confirmada por una carta de Benjamín Domínguez, fechada dos días después, en la que le informa que la vocinglería desatada por el hecho de haberse nombrado sólo Roquistas para el Directorio del Banco, obedecía a que

"...se ofrece el puesto a los Cívicos y no lo aceptan; no se quiere nombrar a los Juaristas, entónces no queda mas que los Roquistas, fracción del partido nacional, que por ser de más dignidad resistió las influencias de los Juárez, y tuvo bastante decisión en su partido para no pasarse al enemigo".<sup>11784</sup>

Dos años más tarde, Dermidio A. de Olmos le informaba a Roca que en el periódico La Libertad, órgano del Civismo recalcitrante, se registraba un suelto, en el número del 23-V-1893, donde se defendía sin que nadie lo ataque al Gerente del Banco Nacional en Liquidación Sr. Juan Ramón Muñóz Cabrera,<sup>11785</sup> por cuanto Julio Astrada trataba de sustituirlo por el hecho de haber conminado a José María Bouquet,<sup>11786</sup> "...a arreglar sus cuentas".<sup>11787</sup> La lucha política se había vuelto en Córdoba muy desigual, a juicio de Olmos, por cuanto en el Banco Nacional se daban "...un Gerente Cívico-Pizarrista [Muñóz Cabrera] y un Consejo de Pizarro", y en el Banco de la Nación "...un Directorio Cívico-Radical en su totalidad...agregado a otro Directorio totalmente Pizarrista en el Banco Provincial".<sup>11788</sup>

Y en Mendoza, a comienzos de este siglo, en oportunidad del gobierno Lencinista, pasaron a detentar cargos en el aparato financiero miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre los que fueron parte del Poder Legislativo figuraban:

"...Juan A. Dufau, senador, intendente, y actual miembro del Banco de la Provincia, uno de los radicales de fuste al lado del Sr. Lencinas;...Jorge Céspedes, senador, diputado, actualmente miembro del Banco de la Provincia; Rufino Ortega (h), diputado durante las épocas de Civit y Galigniana Segura, que fue después Gobernador, dejado por Civit, y ahora es Presidente del Crédito Público;<sup>11789</sup>

Entre los que integraron el Poder Ejecutivo:

"...Eduardo Evans, que fue Comisario de Ordenes en el gobierno anterior, es actualmente Secretario del Banco de la Provincia,"<sup>11790</sup>

Dicha voluntad había repartido los puestos más importantes de la administración pública entre todos sus parientes y allegados, entre los cuales

"... uno de los primos Sr. Videla Bougat, gerente del Banco de la Provincia."<sup>11791</sup>

Las impugnaciones de los gerentes de bancos se extendieron a la órbita municipal. En Mendoza, cuando los Cívicos le exigieron al Gobernador Rufino Ortega que el Gerente del Banco Nacional Alberto Beceyra renunciara a su banca de la Municipalidad, Ortega alegó que dicha incompatibilidad no existía,

"...por lo especial de las funciones municipales, que no son de carácter político, ni ofrecen el carácter de un puesto o empleo, puesto que no son remunerados".<sup>11792</sup>

Finalmente, las impugnaciones de los gerentes de bancos que detentaban cargos políticos se extendieron en este siglo a la órbita privada. El que los Directores de Bancos privados, que ocupaban cargos legislativos, estuvieren presentes en las Comisiones que trataban temas de índole bancaria, fue puesto en tela de juicio durante la llamada década infame por un político conservador.<sup>11793</sup>

#### **I-IV La programación de cobros, plazos y renovaciones.**

La elección de los gerentes, los miembros del Directorio o Consejo consultivo de los bancos, y de sus Síndicos, y la programación de los cobros, los plazos, y las renovaciones de las deudas impagas eran parte de la corrupción y el teatro político. En la composición del Directorio de los bancos se fraguaban las alianzas y coaliciones políticas. En Corrientes, el dirigente Autonomista Rodolfo Alurralde lo prevenía al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que los liberales (Mitristas) "...trabajan por traer acá como Gerente [del Banco Nacional] a un Sr. Silva, actual Gerente de Santa Fé y yerno de Nicolás Ferré".<sup>11794</sup> Esto sería, a juicio de Alurralde, "...sumamente perjudicial porque desde luego seríamos excluidos de los beneficios del Banco todos los Autonomistas".<sup>11795</sup> Un año más tarde, el Gobernador Manuel Derqui le informaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman que el cambio anunciado se produjo.<sup>11796</sup> Desde Santiago del Estero, en 1881, el Gerente del Banco Nacional Rafael de la Plaza,<sup>11797</sup> le informaba a su hermano el Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que Absalón Rojas "...ha manifestado aquí que tiene seguridad completa de obtener este puesto (que ocupo) para su cuñado Lídoro Quinteros [aquel Coronel que se destacara en Belgrano]".<sup>11798</sup> Sin embargo, la sola mención de Quinteros, despertó la inmediata oposición de Miguel Nougués, Eudoro Avellaneda y Sisto Terán. Este último aseguraba que Quinteros

"...está mal con la inmensa mayoría si no con casi la totalidad de nuestros amigos, encontrándose en idéntico caso respecto de los que no lo son y de aquellos que podemos llamarlos indiferentes".<sup>11799</sup>

Dos años más tarde, en 1883, el Gobernador Luis G. Pinto, quien a su vez dirigía la principal Casa de comercio de Santiago, le aconsejaba a Roca

"...cambiar a la mayor brevedad el Consejo Consultivo y el Gerente de la Sucursal del Banco Nacional, pues aquél está representado por [Francisco] Olivera y

[Mariano] Santillán, y aunque el Gerente [Sr. Voget] tiene alguna relación conmigo, es cuñado de Olivera y por consiguiente el Banco tiene sus fondos a disposición de nuestros enemigos políticos, que los usan en perjuicio de nuestra administración".<sup>11800</sup>

Un par de meses después, el mismo Pinto insistía ante Roca que la mala voluntad del Banco Nacional

"...para conmigo y todos los amigos políticos por mas que la responsabilidad supere a los créditos que se traten de abrir, mientras que con los parciales de Olivera se procede en sentido contrario. Estos tiene créditos ilimitados a pesar de no tener responsabilidad de ningún género".<sup>11801</sup>

Y pasado algo más de un año, Pinto le revelaba a Juárez Celman que Rojas trabajaba activamente "...por hacer saltar al Gerente de esta sucursal del Banco Nacional para tomarse por completo el Banco pues ya tiene el Consejo consultivo".<sup>11802</sup> Como en enero de 1885, el Ministro de Hacienda Dr. Wenceslao Pacheco,<sup>11803</sup> no aceptó el candidato propuesto por Rojas, este último le sugirió nombrar a su conculado Martín Posse o a su cuñado Octavio Sosa.<sup>11804</sup> Nombrados este último y Cayetano Carbonell, para el Rochista Félix Cordero el Banco "...apreta a todo Rochista, nuestra firma es abiertamente rechazada de manera que no podemos servir ya a nadie".<sup>11805</sup> Diariamente, dice Cordero, "...nos hacen muchos amigos pedidos para atender estas exigencias que los coloca en condiciones horribles".<sup>11806</sup>

En La Rioja, en 1879, el Gobernador Jamín Ocampo se engañaba, a juicio de Joaquín Acuña, si creía que el Gerente del Banco Nacional "...pueda seguir sus insinuaciones, pues sigue ciegamente las de sus cuñados el Senador Dr. Abel Bazán y el Juez Federal de La Rioja Dr. Mardoqueo Molina".<sup>11807</sup> Seis años después, en 1885, el dirigente Bustista,<sup>11808</sup> y futuro Ministro de Gobierno Olímpides E. Pereyra le transmitía a Juárez Celman el miedo que se quisiera convertir el Banco "...donde imperaba la familia Luna y Bazán...en elemento de lucha para meter en danza al [Dr. Abel Bazán] cuñado de [Benjamín] Sastre".<sup>11809</sup> En Catamarca, a fines de 1882, el candidato a Gobernador de la Provincia Manuel F. Rodríguez le reportaba a Roca que el Gerente y el Cajero de la Sucursal del Banco Nacional, que eran a su vez Diputados a la Legislatura, "...son los que con más empeño han trabajado en contra de mi candidatura".<sup>11810</sup> Para ello utilizaban la propia sede del Banco, "...comprometiendo seriamente de esta manera el crédito de una institución".<sup>11811</sup> Dos años más tarde, Francisco Caracciolo Figueroa le reprochaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que insistiera en colocar de Gerente de la Sucursal del Banco Nacional "...a un cuñado de [Fidel] Castro...removiendo al Sr. Don José María Pare sin otro pretexto, sin duda, que ser este Sr. pariente mío".<sup>11812</sup> Y al año siguiente, en 1885, el Gobernador José Daza le sugería a Roca que era

"...menester de contar con el Banco...no para derrochar sino para que ciertos amigos poseedores de bienes raíces puedan ser atendidos con algunas consideraciones, sin quebrantar las disposiciones bancarias".<sup>11813</sup>

Y otro año más tarde, en 1886, Daza le clamaba a Roca "...que se cambie el Directorio de esta Sucursal principiando por el Gerente, me hacen una guerra de vida o muerte".<sup>11814</sup> Y en agosto de 1890, el ex-Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo Figueroa le confiesa a Roca que

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, han fraguado una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el nuevo Directorio del Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas amigos que Vd., se lo comunico para que evite el golpe si hubiera de hacerse".<sup>11815</sup>

Dos años después, al prometer el Gobernador Gustavo Ferrari inspeccionar "...aquel banco provincial de Catamarca, que era una especie de ministerio de Eleusis, y sobre el cual recaían tantas acusaciones",<sup>11816</sup> se desencadenó un clima golpista que finalmente provocó un golpe de estado, seguido por la intervención federal, y por la reinstalación del Gobernador Ferrari en el cargo.<sup>11817</sup> Pero el Banco Provincial no quedó inmune al golpe de estado, pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y tantos pesos del banco.<sup>11818</sup> En el Banco de Córdoba, en 1890, el Ministro de Gobierno B. Domínguez le informaba a Roca que el Síndico José Rodríguez del Busto, nombrado por el Gobernador Marcos Juárez,

"...emplearía su puesto en beneficio de la política y contra toda la circunspección que debe tenerse en tales puestos, llevando como ya lo ha hecho al conocimiento del público el estado de los negocios particulares de las personas que no le son afectas".<sup>11819</sup>

Y un Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para inspeccionar la conducta del Gerente de la sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros del banco y se encontró con que el candidato [a reemplazar al gerente] era el mayor deudor y el único que no servía sus débitos".<sup>11820</sup>

Amén del Banco Provincial, para el salteño Francisco J. Ortiz, la Jefatura de la Frontera, los Senadores Nacionales, el Juzgado Federal, el Rectorado del Colegio Nacional, y la Aduana Nacional, eran lo que para Gramsci la extensa red de trincheras y casamatas de la sociedad civil,

"...otros tantos castillejos desde nos hacen fuego cuando se presenta la ocasión, porque todos estos empleos les pertenecen hoy y es necesario irlos desalojando poco a poco de estas posiciones que han atrapado durante el gobierno de Sarmiento y de las que se valen sin miramiento alguno para sus fines políticos".<sup>11821</sup>

Los bancos oficiales llegaron a ser calificados con acierto, por Aristóbulo del Valle, de "planta de corrupción y de ruina".<sup>11822</sup> Con respecto a la coexistencia en cada provincia de dos Bancos del Estado, y a la manipulación política de que eran objeto por los Gobernadores de provincia, el Dr. Juan A. Terry le manifestaba a Próspero García

"...que la política del 80 aún no ha terminado su obra organizadora y que en sus primeras sesiones se ocupará de buscar el medio más sencillo para hacer desaparecer el Banco de la Provincia de Buenos Aires que hoy es un arma política de gran alcance y de perfecta precisión en manos del Dr. Rocha".<sup>11823</sup>

Conocedores los Rochistas de la existencia de una amenaza de una ley de conversión,

"...se preparan a resistir y como medida previa se ocupan de colmar las cajas del Banco con el mayor oro posible, a fin de parar el golpe si el se produce en el sentido de obligarlo a la conversión".<sup>11824</sup>

Existía en ese entonces la sospecha de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires "...será la piedra de donde surgirá la chispa encargada por la providencia y por los malos hijos deste país a incendiar toda la República".<sup>11825</sup> En Mendoza, los Bancos Nacional y Provincial eran en 1888, según el ex-Gobernador Rufino Ortega, "...el cuartel general de nuestros opositores, ambos establecimientos están completamente a disposición del [Gobernador Tiburcio] Benegas".<sup>11826</sup> Y diez años después, en 1897, el ex-Senador Nacional Emilio Civit le ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,<sup>11827</sup> hombre del Diputado Nacional Benito Villanueva, sea designado Gerente del Banco Nación en reemplazo de Elías Villanueva, pues es sabido que el fuerte de aquél "...ha sido siempre el torniquete bancario y la tropa de línea".<sup>11828</sup>

#### **I-V La instrumentación de la Banca para el favoritismo y la discriminación política.**

Los bancos fueron y son desde su creación instrumentos de formación y destrucción de hegemonías políticas. En Mendoza, en Noviembre de 1890, Ortega le confesaba al General Roca, que

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno financiero. Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando hábilmente, quebrarlos allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de Aquiles estos señores".<sup>11829</sup>

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que

"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus intereses personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede llevar adonde se quiera".<sup>11830</sup>

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, desmontan a [Oseas] Guiñazú y al gran diablo".<sup>11831</sup>

En Salta, en 1895, los principales accionistas de la Sociedad "El Edén",<sup>11832</sup> eran los que representaban "...la política desastrosa de la época pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y dejaron exhaustas las Cajas del Banco Provincial".<sup>11833</sup> Entre estos últimos, el caso de José Antonio Chavarría era el más ostensible por cuanto estaba "...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] Güemes por el negocio de los \$118.000 que se hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el Banco [Provincial] y que la Legislatura declaró ilegal".<sup>11834</sup>

En Córdoba, a fines del aciago año de 1890 Diego Chapeaurouge le denunciaba a Roca que "...si son ciertos la mitad de los cargos [acusaciones] al Banco, hay para un proceso".<sup>11835</sup> Pero le aclaraba a Roca, que el Directorio de ese entonces "...tomó el esqueleto del Banco y casi no ha prestado nada", siendo los responsables del desquicio financiero los directores anteriores (Juan José Pitt, Julio Astrada, Santiago Díaz, Aranda y otros).<sup>11836</sup> El Ministro de Gobierno Bernabé Domínguez intentaba justificar el despilfarro denunciándole a Roca que

"...entre los Cívicos está el mayor número de quebrados y es a los que menos conviene que se abra el Banco; y no creas que esto es farsa; los amigos de Marcos

[Juárez], si bien abusaron del crédito, ganaron también mucho en sus negocios, mientras que los otros abusaron también y no ganaron".<sup>11837</sup>

A comienzos de 1892, el Jefe del partido Nacionalista Julio Astrada volvió a valerse de "...la Presidencia del Banco".<sup>11838</sup> Y la organización partidaria denominada los Palomas Blancas,<sup>11839</sup> operada por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo", contaba con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, Angel Machado,<sup>11840</sup> y Alejandro Vieyra, que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,

"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel y amagan revolución".<sup>11841</sup>

Y en Buenos Aires, en 1889, cuando Gregorio Torres,<sup>11842</sup> se entera que el dirigente político Mendocino Benito Villanueva iba a ser nombrado Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, le decía a Roca

"...me imagino que será para que Julio Costa,<sup>11843</sup> pueda hacer sus trabajos a la gobernación sin que se le diga que abusa del Banco el cual en manos de Don Benito sería como si lo estuviese en los de Costa".<sup>11844</sup>

En tiempos del Gobernador Dardo Rocha (1883), el Banco de la Provincia de Buenos Aires había intentado conquistar las situaciones del interior del país, en gran parte celebrando contratos para la instalación de sucursales,<sup>11845</sup> adquiriendo prensa propia o sobornando a la prensa existente.<sup>11846</sup> En San Luis, el periodista Joaquín Carlés, Director de El Oasis, le anunciaba a Roca que

"...la mano de Rocha se siente ya y diputados al Congreso Nacional que recibieron dinero del Banco de la Provincia, para fines particulares, y a cuenta de servicios ulteriores".<sup>11847</sup>

En Catamarca, a juicio del Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto, la Casa Comercial de los Molina, vinculada al ex-Gobernador de Catamarca Gral. Octaviano Navarro, se encontraba a comienzos de 1883

"...en condiciones desfavorables y ha podido ralear [sic] la banca rota mediante un fuerte préstamo que ha obtenido del Banco Provincial de Buenos Aires".<sup>11848</sup>

Y en Santiago del Estero, el Comandante Aureliano Cuenca le advierte al Gobernador de Córdoba Juárez Celman que "...se fije mucho en las armas y los medios de que se está valiendo Rocha para ganar los gobernadores de provincia".<sup>11849</sup> Y el Senador Nacional Absalón Rojas le sugería a Roca la posibilidad de que en Febrero de 1885 se produjera un motín, pues a Rocha

"...le conviene cualquier alarma y al fin y al cabo puede exigirles que hagan cualquier bochinche para no perder del todo su plata o mejor dicho la plata del Banco de la Provincia, de ese Banco que es necesario quitarles como se quita el arma de fuego de manos de un muchacho travieso y que hicimos mal en no quitarles a tiempo".<sup>11850</sup>

## **I-VI La quiebra de la banca privada.**

La quiebra de la banca privada también involucraba a los poderes públicos. En Mendoza, en 1879, Lauro Galigniana Villanueva le advertía a Roca con referencia a la quiebra de la Banca González,<sup>11851</sup> que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".<sup>11852</sup> Y cuando el Banco de Cuyo,<sup>11853</sup> con sede en San Juan, entró en liquidación, la mayoría de los accionistas tenía interés en un arreglo que se haría con el Banco Nacional,<sup>11854</sup> pero los tenedores de una tercera parte de las acciones, propiedad de Clemente y Juan José Videla, se opusieron a ello por cuanto estando el Banco en manos de ellos "...obtienen ventajas que no alcanzan a los otros accionistas, a la vez que les sirve la institución de poderosa arma política".<sup>11855</sup> También en Entre Ríos se registró el impacto de la quiebra de bancos privados.<sup>11856</sup> Y en Catamarca, la Revolución de Junio de 1891 había sido hecha, según el Diputado Félix T. Avellaneda, "...por mercenarios traídos por quebrados deudores a los Bancos de aquí".<sup>11857</sup> Estos reiterados abusos, hicieron decir al Gobernador de Salta y ex-Gerente del Banco Nacional Pío Uriburu Castro, que para el Directorio del Banco de la Nación "...cada Provincia es una toldería y cada comerciante un ladrón".<sup>11858</sup>

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de la modernidad mercantil-absolutista aún se hallaba presente en la segunda mitad del siglo XIX.

## **Epilogo-Sección V-B**

Sobre la base de los conflictos de nepotismo suscitados en las gobernaciones de Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fé y Entre Ríos aquí relatados, y los numerosos parentescos entre los miembros de las familias de la elite política y entre los Gobernadores, Diputados, Senadores, Jueces, Generales, Ministros, Gerentes de Bancos nacionales y provinciales, Administradores de Correos y Telégrafos, Rectores de Colegios Nacionales y Administradores de Ferrocarriles, que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, debemos concluir que el sistema aristocrático o monárquico fue entre nosotros una patética realidad; y que las estructuras oligárquicas locales vigentes en los partidos conservadores fueron más fuertes que cambio político, división de poderes o forma republicana alguna, incluidas la llamada Organización Nacional, y la propia Ley Sáenz Peña; pues lograron perpetuarse en el tiempo.

Cuando la supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación política, lo que ocurrió fue que las oligarquías acudieron a la intervención militar, en una escala nacional. La inmigración masiva, la educación obligatoria (Ley Láinez) y la Reforma Universitaria, si bien lograron acelerar la movilidad social, ampliar la base de reclutamiento de la elite, y con ella la circulación de las elites políticas, no habría transformando a la elite política conservadora (denominada oligarquía argentina), producto de una mecánica sumatoria de oligarquías provinciales, en una burguesía nacional independiente. También podemos concluir que la falta de independencia de la justicia, los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes judiciales del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados

como para certificar que las prácticas del absolutismo aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

No obstante toda esta legislación, el fraude electoral se perpetuó aún mas en el tiempo, y hubo que esperar primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, Joaquín V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones uninominales, aunque de voto verbal o cantado,<sup>11859</sup> declarada inconstitucional por el Presidente Quintana, y luego diez años mas, hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto universal masculino, secreto y obligatorio.<sup>11860</sup> Sin embargo, a partir del 30 hubo que observar nuevamente la restauración del fraude, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la Ley 12.298, por la cual se retornó al sistema de lista completa.<sup>11861</sup> Por último, con el acceso del Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la novedad de incluir en el voto universal al voto femenino. Asimismo, el gobierno Peronista, con el objeto de triunfar como sea rediseñó en la Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja.<sup>11862</sup>

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes militares del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que las prácticas del absolutismo aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX. Igualmente, podemos aseverar que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de la modernidad mercantil-absolutista aún se hallaba presente en la segunda mitad del siglo XIX.

## **Sección V-C**

### **Capítulo V-C-11      Conclusión**

Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por los autores citados en los diversos capítulos de la obra es que reducen la exclusión y la neutralización social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo, entre los mecanismos de exclusión y neutralización toda referencia a los mecanismos aristocratizantes del parentesco y del nepotismo, y a los absolutistas del estamentalismo y el patrimonialismo, a los mecanismos burocráticos del control de la banca, la prensa, la educación, la iglesia, la milicia, la justicia y las comunicaciones (tribuna, prensa, telegrafía y radiotelefonía), y a los mecanismos políticos de las relaciones entre partidos, ciudades y estados provinciales y nacionales.

La endeblesz de muchos de los análisis tradicionales procede en mi opinión del afán de tomar tanto al estado como a la familia, la banca, la prensa, la justicia, la educación (media y superior), las comunicaciones (postales, telegráficas y radiotelefónicas) y los partidos o facciones políticos con un criterio instrumentalista, en lugar de visualizarlos como meros espacios donde se inscribieron relaciones de fuerzas. Para las concepciones funcionalistas, hasta hace poco prevalecientes, la familia fue tomada como la célula básica o la organización primaria de la sociedad; y para las concepciones Gramscianas y Althusserianas como un aparato ideológico perteneciente a la sociedad civil, ideal para la mediación y resolución de conflictos.<sup>11863</sup> En realidad, la familia, los partidos, clubes o

facciones políticas, la prensa, la banca, los colegios nacionales y la justicia federal serían más bien la resultante de antagonismos sociales y regionales inscriptos en la propia estructura del estado, o la condensación material y específica de relaciones de fuerzas entre parientes, regiones e instituciones.<sup>11864</sup> Los análisis tradicionales estarían fundados asimismo, a la luz de una interpretación Foucaultiana, en una errónea concepción acerca de la índole o naturaleza del poder. Para los autores estructuralistas que en su momento siguieron a Althusser, el poder de los aparatos ideológicos sería algo así como el instrumento o la propiedad adquirida de una clase dominante, cuando en realidad, en opinión de Gramsci primero y de Foucault más luego, el poder sería más bien el ejercicio actual de una estrategia de dominación, y no sería atributo de un sujeto sino de una relación de fuerzas, que pasa tanto por las fuerzas dominantes como por las subalternas.<sup>11865</sup> En el juego de dichas estrategias, las transiciones y rupturas políticas, progresivas y regresivas, por transacción o por colapso, que se manifestaron en las sucesivas olas y contra-olas políticas, estarían ligadas entonces no con las respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo proponía el estructuralismo de Wright (1975), Peralta Ramos (1978), Ansaldi (1985) y Sábato (1988), sino con los cambios en las formaciones y prácticas o estrategias discursivas.<sup>11866</sup>

## **Capítulo 0 Resumen General de toda la Obra**

En conclusión, podemos afirmar, que el origen de la tragedia desatada a fines del siglo XX en el cono sur de América Latina debe encontrarse en las deformaciones del orden nacional-republicano y en las reminiscencias de los órdenes prehispánico e imperial-absolutista. Dichas reminiscencias y deformaciones constituyeron un nudo complejo -- formado por despotismos asiáticos, patriarcalismos, racismos, prebendarismos, mercantilismos, patrimonialismos, corporativismos, clerical-regalismos, pretorianismos y nepotismos-- que son los mismos en defensa de los cuales se vino a desatar a fines de siglo una tragedia sin nombre. Así también, los estados-subordinados o coloniales, las nacionalidades latinoamericanas, y la metanastasis o desorden interno generalizado, encontraron su base en los innumerables, complejos y enigmáticos conflictos, fracturas y correlaciones de fuerzas culturales, políticas, sociales y económicas, acontecidos durante los períodos correspondientes a los órdenes imperial-absolutista y nacional-republicano.

Los órdenes prehispánico e imperial-absolutista adquirieron en el Río de la Plata connotaciones muy peculiares y muy distintas de las que caracterizaron al resto del dominio español. Desde sus orígenes, dicho orden en el Río de la Plata se caracterizó por ser el eslabón débil de la dominación absolutista en el mundo colonial al ser la puerta de entrada del pensamiento heterodoxo erasmiano y al contar con una desmedida impronta del capital comercial y de las consiguientes políticas mercantilistas, acompañadas por media docena de sub-órdenes, tales como el barroco, el estamental, el señorial, el patrimonial, el corporativo y el nepótico.

La amenaza política que los períodos de guerra y paz significaban, como elemento desencadenante de las crisis político-culturales coloniales y nacionales, variaba según la composición de la balanza de poder. Las fracturas políticas en el mundo colonial se habrían suscitado no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, pues la lucha contra los fueros capitulares persistió. Si bien la burocracia subordinada (virreyes,

gobernadores y Reales Audiencias) perpetuó su derecho a interferir en las elecciones capitulares, en el nombramiento de autoridades políticas menores, y en los actos de honor o representación (privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial público profano), los integrantes de los cabildos no cesaron de luchar por sus privilegios y fueros. También los obispos continuaron interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real, y la burocracia subordinada (virreyes, gobernadores y Reales Audiencias) continuó combatiendo los fueros eclesiásticos. Por lo demás, estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites y cabildos locales.

La dualidad política subsistente entre los cabildos y la burocracia política subordinada (virreyes, gobernadores y oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y corporativos la mayor parte de la población masculina libre activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos cabildos contribuyeron a acelerar la transición hacia un orden cultural, político y social más próximo al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron instituciones revolucionarias (Asamblea de 1813 y Directorio de 1815 en la jurisdicción del antiguo Virreinato del Río de la Plata) las que actuando en medio de un desorden interno generalizado o metanastasis supieron suprimir los fueros concejiles,<sup>11867</sup> y disponer la renovación de los capitulares por elección popular.<sup>11868</sup>

También, podemos afirmar sobre la base de las innumerables y complejas fracturas político-eclesiásticas suscitadas entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y la burocracia política subordinada (virreyes, gobernadores y oidores) continuó participando en las decisiones eclesiásticas. No solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda, los gremios de azogueros y hacendados y la milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la disolución del imperio español y la denominada Revolución de Independencia apenas lograron disipar.

Los conflictos y fracturas político-militares entre la milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de los cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. La Real Ordenanza de Intendentes (1782), fruto de la función legislativa del estado superior --tal como caracteriza Jellinek a los estados metropolitanos-- otorgó el goce del fuero militar a los contadores y tesoreros de las Cajas Reales principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.<sup>11869</sup> Sin embargo, el goce del fuero militar cesaba respecto a los militares que tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en el oficio político.<sup>11870</sup> Pese a estas limitaciones, la milicia habría logrado una sostenida preeminencia social que la Revolución de Independencia tampoco logró disipar. Ella habría logrado generar un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las capas y grupos marginales y de inmovilidad de ciertos miembros de las capas superiores. Asimismo, la milicia con sus fueros incidió negativamente en la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez de los mercados de trabajo.

Por otro lado, las fracturas sociales obedecían a motivos étnicos, estamentales, clánicos y religioso-identitarios. En cuanto a los ciclos y movimientos sociales, la amenaza social que ocasionaban las migraciones internas y externas, la movilización de los sectores populares o de las regiones interiores, la integración de coaliciones políticas (autoritarias o democráticas); y las fracturas en las formas de estado (por colapso, transacción o destape), variaba con el tenor del equilibrio vigente en los flujos sociales y el grado de autonomía relativa que detentaban las instituciones estatales respecto de la presión de las masas. Así por ejemplo, durante la hegemonía del orden imperial-absolutista, la amenaza indígena, concretada en el siglo XVII por las Rebeliones Calchaquíes, y en el siglo XVIII por las Rebeliones Comuneras y Tupamaristas, destacó el rol coercitivo de las burocracias subordinadas Habsburga y Borbónica. La más dolorosa de las fracturas y que más heridas abrió en el frente interno colonial, difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide racial o biológica donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos), y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la milicia, a la universidad, a las órdenes terceras, o al cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la quiebra del orden absolutista y de la fragmentación del imperio español.

La amenaza económica que encerraban las declaraciones de guerra y paz de las metrópolis europeas era además un factor desencadenante de las crisis comerciales coloniales. Asimismo, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos suscitados en el comercio de fines del siglo XVIII, que la fractura social subsistente entre los mercaderes mismos asfixiaba también a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y corporativos la mayor parte de la población mercantil activa estaba excluida de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado y en cada uno de los cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas a la sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX. Las desavenencias originadas por el trato desigual derivaron en particiones y separatismos (Virreinato peruano) y anexionismos (Virreinato del Plata) que fueron desestructurando el espacio colonial evocando así en la elite intelectual fenómenos semejantes que le acontecieron al antiguo imperio romano. Sin duda, en estas fracturas se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las denominadas independencia argentina, paraguaya, boliviana y uruguaya.

Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por los autores citados en los diversos tomos de esta obra es que reducen la exclusión y la neutralización social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo a otras fracciones de la elite y hasta de la propia oligarquía, en especial a aquellas fracciones constituidas por los disidentes políticos, los llamados "parientes pobres" o "venidos a menos", la burocracia de toga, y las elites oligárquicas de las provincias periféricas pertenecientes a los cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata (en Argentina las provincias

de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis). Asimismo, entre los métodos de exclusión y neutralización omiten toda referencia a los mecanismos aristocratizantes del parentesco y del nepotismo, a los mecanismos corporativos del clericalismo y el pretorianismo, a los mecanismos burocráticos del control de la banca, la prensa, la educación, la justicia y las comunicaciones (tribuna, prensa, telegrafía y radiotelefonía), y a los mecanismos políticos de las relaciones entre partidos, ciudades y estados provinciales y nacionales.

La endeblez de muchos de los análisis tradicionales procede en mi opinión del afán de tomar tanto al estado como a la familia, la banca, la prensa, la iglesia, la justicia, la educación (media y superior), las comunicaciones (postales, telegráficas y radiotelefónicas) y los partidos o facciones políticos con un criterio instrumentalista, en lugar de visualizarlos como meros espacios donde se inscribieron complejas relaciones de fuerzas. Para las concepciones funcionalistas, hasta hace poco prevalecientes, la familia fue tomada como la célula básica o la organización primaria de la sociedad; y para las concepciones Gramscianas y Althusserianas como un aparato ideológico perteneciente a la sociedad civil, ideal para la mediación y resolución de conflictos.<sup>11871</sup> En realidad la familia, los partidos, clubes o facciones políticas, la prensa, la banca, la iglesia, los colegios nacionales y la justicia federal, serían más bien la resultante de antagonismos sociales y regionales inscriptos en la propia estructura del estado, o la condensación material y específica de relaciones de fuerzas entre parientes, regiones e instituciones.<sup>11872</sup> Los análisis tradicionales estarían fundados asimismo, a la luz de una interpretación Foucaultiana, en una errónea concepción acerca de la índole o naturaleza del poder. Para los autores estructuralistas que en su momento siguieron a Althusser, el poder de los aparatos ideológicos sería algo así como el instrumento o la propiedad adquirida de una clase dominante, cuando en realidad, en opinión de Gramsci primero y de Foucault más luego, el poder sería más bien el ejercicio actual de una estrategia de dominación, y no sería atributo de un sujeto sino de una relación de fuerzas, que pasa tanto por las fuerzas dominantes como por las dependientes.<sup>11873</sup> En el juego de dichas estrategias, las transiciones y fracturas políticas, progresivas y regresivas, por transacción o por colapso o derrumbe, que se manifestaron en las sucesivas olas y contra-olas políticas, estarían ligadas entonces no con las respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo proponía el estructuralismo de Wright (1975), Peralta Ramos (1978), Ansaldi (1985) y Sábato (1988), sino con los cambios en las formaciones y prácticas o estrategias discursivas.<sup>11874</sup>

En suma, las transiciones y fracturas políticas que las olas y contra-olas políticas significaron no han mantenido una correlación directa con los ciclos económicos. Entre ellas hubo notorios des-fasajes. Durante la tercer contra-ola regresiva del siglo XIX o de hegemonía del estado autocrático (1827-1852), posterior a la Guerra de Independencia, la fase mundial de estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev (1820/25-1848/52), combinada con la amenaza militar centralista (unitaria) y la amenaza imperial europea, no hizo más que acentuar las connotaciones autoritarias del régimen autocrático. La transición política desde la tercera contra-ola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola progresiva (1852-1880), que transcurrió entre 1852 y 1862, se correlacionó positivamente con el inicio de la fase mundial de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta transición la amenaza social que la presencia de las elites y las masas rurales de las provincias interiores significaron fue equilibrada mediante compromisos o acuerdos (Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y Constituciones Nacional y Provinciales). En las tres fases siguientes de la cuarta ola

progresiva (1862-80), la amenaza social que la presencia de las montoneras (Peñaloza, 1862 y Varela, 1867) significó fue equilibrada militarmente mediante los Ejércitos de línea.

Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia un régimen hegemónico (el Unicato Roquista) y fuera posible una exitosa fractura a escala nacional fue necesario que las elites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;<sup>11875</sup> que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;<sup>11876</sup> y que se imponía una lucha político-cultural y no una militar para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales.

Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones constituyentes),<sup>11877</sup> el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),<sup>11878</sup> la justicia (jueces federales),<sup>11879</sup> la información periodística (corresponsales de la prensa porteña),<sup>11880</sup> las comunicaciones postales y telegráficas,<sup>11881</sup> los clanes familiares (a través del parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad pública (sociedades de beneficencia).<sup>11882</sup>

En resumen, el putsch y el crimen políticos con connotaciones de terrorismo de estado como los acontecidos en San Juan (1884), que en el tomo respectivo hemos tomado como paradigmáticos, se inscriben en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca con el colapso del orden imperial-absolutista, específicamente con la violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el magnicidio del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los mismos protagonistas de las asonadas, o intentos frustrados de fractura, es decir por las facciones moderadas. La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad.

Finalmente, tampoco los pactos o acuerdos políticos fueron funcionales para controlar las incertidumbres políticas y afianzar la institucionalidad. El hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela; ni el

Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930;<sup>11883</sup> ni el levantamiento de la abstención electoral, por parte de Alvear en 1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, los suicidios de Lisandro de la Torre y Leopoldo Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943. Tampoco el Pacto Perón-Frondizi (1958) desbarató el golpe de 1962; ni el Acuerdo Perón-Balbín (1972) impidió el acceso al poder de la extrema derecha Lopezreguista y la recaída en un golpe autoritario-terrorista (golpe de Videla de 1976); ni el Pacto de Semana Santa (Punto Final y Obediencia Debida) neutralizó o desmovilizó a las fuerzas militares golpistas; ni el Pacto Menem-Alfonsín o Pacto de Olivos (1994) obstaculizó la creciente corrupción de la sociedad civil y de la esfera pública,<sup>11884</sup> el fortalecimiento del presidencialismo, la abdicación por parte del estado del monopolio de la violencia (privatización de la seguridad), el nepotismo, el amiguismo, la connivencia con el narcotráfico y el narco-lavado internacional,<sup>11885</sup> las insurrecciones regionales,<sup>11886</sup> una potencial insurrección popular y la eventual recaída en una nueva contra-ola regresiva.<sup>11887</sup> Queda entonces en manos de las fuerzas progresistas frenar esta crisis e impedir --mediante fuertes políticas moralizantes y reformistas-- que la crisis democrática se transforme en cataclismo.

El caso Rioplatense y el caso Argentino aquí tratados revelaron también tener profundas implicaciones para el desarrollo de las teorías acerca del atraso y la periferización de las sociedades neo-coloniales. Para Waisman (1987), las sociedades periféricas se reducían a los tipos de los llamados países nuevos y/o subdesarrollados. Este estudio pretende probar que dicha categorización es excluyente por cuanto habría otras categorías aún no suficientemente desarrolladas que hacen alusión a la inercia o persistencia de los patrones y valores del orden imperial-absolutista y del cesarismo neo-colonial (dictadura Rosista) también subsistentes en la sociedad moderna. En el orden nacional-republicano posterior a la denominada Organización Nacional (régimen oligárquico-conservador) se destacan entonces cinco acápites fundamentales:

- a) la estructura estamental, señorial y étnica del régimen electoral;
- b) la perpetuación vitalicia en los cargos políticos (sucesiones impuestas o apuntamientos políticos);
- c) el nepotismo inscripto en las estructuras ejecutivas, legislativas, y judiciales;
- d) los motines o putschs militares; y
- e) las rebeliones armadas.

Finalmente, este largo estudio revela implicaciones para el desarrollo de la teoría del estado y recupera un intento propio del pensamiento complejo (Morin) de integrar los dispositivos cognitivos colectivos y los períodos históricos que la historiografía moderna se cansó de fragmentar así como la de pretender comprender la catástrofe política y moral desencadenada a fines del siglo XX. La dificultad conceptual de identificar la pertenencia a determinadas instituciones, tales como los clanes familiares, con el de miembro de la elite política, es que reduce la importancia del rol que cumplía la ideología y la generación. A juzgar por Therborn (1979), quien a su vez se inspirara en Gramsci, la familia no puede considerársela parte del estado.<sup>11888</sup> Sin embargo, mediante el mecanismo del nepotismo, los clanes familiares de las elites provinciales pertenecían de hecho a la sociedad política local. Aquellos estados provinciales cuyas elites políticas estuvieron nepóticamente constituidas por miembros de ciertos clanes familiares contaban con una exigua sociedad

civil. Esta última incluía sólo aquellas familias extensas no vinculadas al poder político. De igual manera, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, reclutada por lo general del seno de la oligarquía, pertenecía mediante el clericalismo del Patronato Real primero, y del Patronato Nacional después, a la sociedad política y no a la sociedad civil. Asimismo, según la tesis de los Barman, era improbable que los miembros de las elites de las provincias periféricas obtuvieran pertenencia o ingresaran a la elite nacional central a menos que fueren excepcionalmente talentosos.<sup>11889</sup> En otras palabras, sólo aquellos miembros de las oligarquías de aquellas provincias cuya expansión se hallaba directa y subordinadamente asociada a la expansión del poder central (Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza) tenían chance de acceder a la oligarquía nacional.<sup>11890</sup>

1 Asi lo caracteriza R. G. Collingwood en *The Idea of history* (Oxford University Press, 1946, I, § 6). Collingwood concluye postulando que fue Tucídides el que ahogó el legado científico de Herodoto bajo el peso de motivaciones antihistóricas. La base de estas aventuradas afirmaciones se localizan en la idea de la historia como recreación de la experiencia del pasado en la que el relato queda, inevitablemente, asociado al horizonte contingente del relator y a sus eventuales prejuicios y preferencias. De allí se sigue la sorprendente afirmación, que Collingwood toma de Benedetto Croce y conforme a la cual siempre toda historia sería, para estos autores, historia contemporánea. La concepción de Tucídides, que representa el otro paradigma de la historia, es del todo diferente porque postula una doble necesidad para el relato histórico: la objetividad estricta, independiente de la posición del relator que queda sujeto a la veracidad posible de los testimonios que tiene a su alcance, y la conexión de los sucesos en una secuencia inteligible en la que se desglosen sus causas remotas y próximas. Acerca del método y la obra de Tucídides el mejor estudio de conjunto es el de Hunter R. Rawlings III: *The Structure of Thucydides' History* (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1981); y la obra reciente que ofrece el mejor panorama actual es la de James V. Morrison: *Reading Thucydides* (Columbus, The Ohio State University Press, 2006).

Corrientes durante el año 2006, oportunidad en la que el autor de este prólogo expuso acerca de los diferentes puntos de vistas de Eric Voegelin y de Hans Kelsen acerca de la nueva ciencia de la política (vid: Eric Voegelin y Hans Kelsen: Examen comparativo de sus opiniones sobre la ciencia política. ITGD, Comunicaciones Científicas, Corrientes, 2006); y el segundo evento corresponde a una Reunión de Filosofía Política realizada en el Museo Roca el 4 de abril de 2007 en la que participaron Leon Rozitchner, Eduardo R. Saguier, Carlos Tobal, Estéban Gerardo, Guillermo Wilde, Marcos Giménez Zapiola, y el autor de este prólogo, y donde se debatieron, al parecer por primera vez en Buenos Aires, varios de los aspectos centrales del pensamiento de Voegelin. Se registran además, en Argentina, uno que otro trabajo informativo que, sin embargo, no ha trascendido fuera del ámbito universitario de origen como el estudio de Marcelo Leiras titulado: Eric Voegelin: la iluminación de la experiencia para una nueva ciencia política publicado en *Deus Mortalis*, 4 (421-446). De aquel libro de 1952 ha circulado primero una edición hecha en Madrid en 1968 (Madrid, ed. Rialp, 1968) y ahora una nueva versión editada en Bs. As. en 2006 (Bs. As., ed. Katz, 2006). De las numerosas obras de Voegelin las mas importante para el trabajo del historiador, al parecer y aparte de *The New Sacience of Politics*, son los cinco volúmenes de *Order and History* publicados a partir de 1956: 1) Volume I: *Israel and revelation* (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1956), 2) Volume II: *The world of the polis* (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1957), 3) Volume III: *Plato and Aristotle* (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1957), 4) Volume IV: *The ecumenic age* (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1974); y 5) Volume V: *In Search of Order*, (University of Missouri Press, 2002), todos editados por Ellis Sandoz. También cabe citar los trabajos reunidos en *Anamnesis* (Universiy of Notre Dame Press, 1978) y en particular *Remembrance of Things Past* allí incluido.

<sup>5</sup> Para la noción de *staatsfragmente* y su aplicación en contextos históricos vid.: J. E. Meabe: *Staatsfragmente* y □□□□□□, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 1999, Tomo I, Ciencias Sociales. Corrientes, Eudene, 1999, pags. 227-230.

<sup>6</sup> Vid. Weber: *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslhere*, Tubinga, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1973, *Rechtssoziologie*, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1960, y, por cierto, el fundamental e incompleto tratado *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1972.

<sup>7</sup> Acerca de la noción de *metanastasis* vid.: Joaquín E. Meabe: *Acerca del carácter coactivo de la □□□□□□□□□□ en Tucídides Materiales para el estudio de la teoría de la ley y la Justicia del Mas Fuerte en Tucídides en Dikaioosyne*, n° 18. En dicho trabajo hemos señalado acerca de esta categoría que: Tucídides utiliza □□□□□□□□□□(Hist., 2, 2,1[15]) con el sentido habitual de migración o desplazamiento, pero es interesante observar que el sustantivo □□□□□□□□□□ en realidad se compone del usual prefijo preposicional □□□□- que es una preposición que significa en medio de o entre y que se utiliza para indicar lo que está más allá de algo en palabras como la construcción derivada metafísica -, y del sustantivo □□□□□□ que significa desorden interno generalizado o disturbio general en el seno de un agregado humano permanente. Con esa peculiar implicación bien puede inferirse entonces, en este contexto, que la □□□□□□□□□□ tal como la utiliza Tucídides en su obra indica que el desplazamiento es algo parecido a un escape de la violencia de la stasis (□□□□□□) y un desplazamiento hacia un escenario más pacífico y estable.

<sup>8</sup> Vid.: M. F. Mantilla, *Crónica histórica de la Provincia de Corrientes*, Bs. As., 1928, vol II, pag. 244-250.

<sup>9</sup> Sobre el pensamiento complejo en Edgar Morin, ver Solis, 2003. Sobre lo antropológico como un desafío complejo, ver Rodríguez Zoya y Salinas, 2002.

<sup>10</sup> ver Garrido, 1995. Sobre el realismo crítico y la sociología histórica, ver Steinmetz, 1998.

<sup>11</sup> Sobre la nueva filosofía. hermenéutica, ver Ortiz Osés, 1986.

<sup>12</sup> Cornell, Rosenfeld y Carlson, 1992; Ebert, 1992-93; Kahn, 1989; Keenan, 1992; Lucaites, 1990; Norris, 1988; Thomas, 1991; y Thompson, 1993, 264.

<sup>13</sup> ver Pocock, 1985; Skinner, 1987; Toews, 1987; Anderson, 1991, 177-180; y Thompson, 1993, 257.

<sup>14</sup> ver Jauss, 1989, 26.

---

<sup>15</sup> ver Fernández Pedemonte, 1996, 177-180.

<sup>16</sup> ver Jauss, 1992, 244, nota 5. Para una crítica de Frye, ver Todorov, 1991, 87-99.

<sup>17</sup> ver Jauss, 1992, capítulo 2.

<sup>18</sup> ver Anderson, 1991, 177-180; Asensi, 1990, 18-20; y Cussen, 1992. Para la crítica de Jauss, ver Nicolás, 1990, 311, 319 y 328; Fokkema e Ibsch, 1988, 207-211; García Berrio, 1989, 246; De Man, 1990, 87-114; Pozuelo Yvancos, 1994, 114-118; y Vattimo, 1996, 102. Para la noción de deconstrucción, ver Nealon, 1992; y Pozuelo Yvancos, 1994, capítulo VII. Para la constelación de mecanismos causales, ver Steinmetz, 1998, 177. Para la producción y recepción de teoría jurídica, ver López-Medina, 2004.

<sup>19</sup> Ver Pazos, 2006; y Le Bot, 2006. Para una breve introducción a Philippe Descola, ver Wilde, 2006, 20-23.

<sup>20</sup> ver Descola, 2005, 151-153

<sup>21</sup> Sobre la constelación de mecanismos causales de Bhaskar, ver Collier, 1994, 335; y Steinmetz, 1998, 177.

<sup>22</sup> El propio Voegelin (1956), sin apelar a la noción de metanastasis, al comentar el famoso debate entre Frankfort y Toynbee sobre la naturaleza del orden faraónico, comparte la connotación que hizo este último respecto de la desintegración endógena del Primer Período Intermedio al final de la sexta dinastía del antiguo egipto (Voegelin, 1956, 56). También las transiciones de la civilización sumero-babilónica a la asiria y de la micénica a la helénica fueron el producto de un desorden cosmológico (Voegelin, 1956, 40). Sobre mito y misterio en la filosofía de Eric Voegelin, ver Hughes, 1993. Para la búsqueda de lo esencial desde las sociedades antiguas hasta la posmodernidad, ver Hughes, 2003. Para la teología en Voegelin, ver Morrissey, 1994.

<sup>23</sup> Dahl, 1971; y Smith, 1974.

<sup>24</sup> Sobre la constelación de mecanismos causales, ver Steinmetz, 1998, 177.

<sup>25</sup> Sobre la canonización de próceres en Salta, ver Cebrelli y Arancibia, 2005, 125-130.

<sup>26</sup> Acerca de la definición de originarios, ver Roulet, 1998.

<sup>27</sup> Voegelin, 1966, 1978; y Marramao, 2006, 116.

<sup>28</sup> Lamentablemente, en la compilación dirigida por Franco y Levin (2007) no hay la menor reflexión acerca de estas posibles interpretaciones.

<sup>29</sup> ver Subirats, 1994, 433. Sobre la cuestión judía en la España del siglo XVI, ver Chalmers, 1996.

<sup>30</sup> Sobre la controversia entre Las Casas y Sepulveda en Valladolid, 1550-1551, ver Zavala, 1977; Hanke, 1992; y Pennington, 1993. Sobre la querella de la conquista en el siglo XVI (Las Casas versus Ginés de Sepúlveda), ver Beuchot Puente, 1992. Sobre la modernidad renacentista como cuarta modernidad, y sobre España y la idea medieval de Imperio, ver Sotelo, 1996, 32.

<sup>31</sup> Sánchez, 1967; Choy, 1985, 59; Zamora, 1988; y Buaas, 1994.

<sup>32</sup> Halperín Donghi, 1993, 746.

<sup>33</sup> Subirats, 1994, 465.

<sup>34</sup> Hardt y Negri, 2002, 101.

<sup>35</sup> González, 1888, libro primero, II.

- 
- <sup>36</sup> seguidos por Matienzo (1910), Levillier (1912), Ingenieros (1918), Ravignani (1938) y Levene (1952).
- <sup>37</sup> Sobre la idea política moderna del poder en Jean Bodin, ver Anderson, 1979, 44-46. Sobre la noción de pacto en Althusius, Bodin, Hobbes y Locke, ver Elazar, 1998. Y sobre el concepto iluminista de nación, ver Palti, 2002, 31-35.
- <sup>38</sup> García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier, 1984, 24. Sobre las nociones genealógicas y anti-genealógicas del concepto de nación, ver Palti, 2002.
- <sup>39</sup> Levene, 1920.
- <sup>40</sup> Para rastrear el origen medieval de esta propensión colectiva vigente en la España Borbónica ver Sicroff (1960).
- <sup>41</sup> Sobre la emergencia de la idea de nacionalidad en el México colonial, ver Corbató, 1943.
- <sup>42</sup> Cortes de Justicia, Salas de Representantes o Legislaturas, Juzgados de Paz, Inspectores de Irrigación, etc.
- <sup>43</sup> Canak, 1984, 8.
- <sup>44</sup> Para comparar con la larga agonía del imperio otomano, ver Mayer, 1981, 1984.
- <sup>45</sup> Semo, 1978, 148.
- <sup>46</sup> Martner, 1923; Mariátegui, 1928; Álvarez, 1929; Coni, 1930; Simonsen, 1937; Chávez Orozco, 1938; Puiggrós, 1940; Astesano, 1941; Martínez de la Torre, 1947-49; Lohmann Villena, 1949; Chevalier, 1952; Peñaloza, 1946; González, 1957; Ramírez Necochea, 1959; Kossok, 1959; Jara, 1966; Macera, 1971; Martínez Peláez, 1971; Semo, 1973; Bakewell, 1977; Gorender, 1978; Kalko G., 1974; Cushner, 1980, 1982.
- <sup>47</sup> Mora, 1836; Lastarria, 1844; Barros Arana, 1854-58; Mitre, 1859; López, 1883; y Alberdi, 1895.
- <sup>48</sup> Binayán, 1923, XCIV.
- <sup>49</sup> Perroy, 1982, 309; Anderson, 1979, 84.
- <sup>50</sup> Roett, 1972; Wiarda, 1974; Uricoechea, 1980; Véliz, 1984.
- <sup>51</sup> Ver Saguier, 1985.
- <sup>52</sup> debo esta reflexión a mi discípula Alejandra Mancuso.
- <sup>53</sup> Andrews, 1980, 142-151. Sobre la emergencia y crisis de las naciones Africanas en el estado Post-Independiente de Buenos Aires, 1820-1860, ver Chamosa, 2003.
- <sup>54</sup> Halperín Donghi, 1969, 39-40; y 1979, 56-57.
- <sup>55</sup> Golte y de la Cadena, 1983, cit. por Mossbrucker, 1990, 15; y Mossbrucker, 1990, 53.
- <sup>56</sup> Roig, 1982, 21.
- <sup>57</sup> Por Duncan Baretta y Markoff (1978) para explicar los casos de fronteras ganaderas en América Latina; por Góngora (1950), Faron (1956), León Solís (1981, 1987), Villalobos (1982, 1985, 1989, 1993), Mayo (1985, 1987), Ruiz-Esqui de Figueroa (1993); Lázaro Avila (1994), Casanova (1989, 1996), Lamo de Espinosa (1995) y Pinto Rodríguez (1996) para explicar los casos del sur de Chile y la frontera Araucana; por Saeger (1985) para el caso del Chaco Santafesino; por Aubert (1991) para el caso del Paraguay; por Garavaglia (1984), Vitar (1991) y Gullón Abao (1993) para el caso del Chaco Tucumano (Santiago del Estero); y por Santamaría (1987), Combes y Saignes (1991) y Presta (1995) para explicar los casos del Alto Perú, Moxos y Chiquitos y la frontera Chiriguana. Sobre la araucanización del caballo, ver Leiva, 1981-82.

---

Sobre los dispositivos de poder en la sociedad colonial fronteriza mapuche, ver Lázaro Avila, 1995; y Boccara, 1996.

<sup>58</sup> Balibar, 1990, citado por Stoler, 1992, 516.

<sup>59</sup> Roig, 1982, 26.

<sup>60</sup> Robinson, 1979, 284, nota 13.

<sup>61</sup> Lemarchand, 1968, 21, 25; y Kuper, 1971, 99-100, citados por Domínguez, 1985, 55-56.

<sup>62</sup> Mascia-Lees, et. al. (1989) y Jameson (1989).

<sup>63</sup> Smith, 1992, 513.

<sup>64</sup> Smith, 1992, 516.

<sup>65</sup> Descola distingue entre los dispositivos cognitivos colectivos aquellos que son explícitos de aquellos otros que llama no reflexivos. Entre estos últimos dispositivos, Descola diferencia los que por ser temáticos y por adaptarse a una gran variedad de situaciones los denomina dispositivos integradores, de aquellos otros que por ser muy específicos y amoldarse a circunstancias muy particulares los califica como especializados (Descola, 2005, 151-153).

<sup>66</sup> Wiarda, 1973, 219.

<sup>67</sup> sustitutos de los destinados al servicio de Milicia, que se obtenían mediante la correspondiente paga.

<sup>68</sup> Real, 1957, 75; y Rodríguez Molas, 1982, 272.

<sup>69</sup> Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil, ignoró totalmente esta institución.

<sup>70</sup> Sobre la polémica de Hastings con Hobsbawm, ver Patiño Villa, 2006, 43-60; y Fernández A. 2005.

<sup>71</sup> Espinosa Fernández de Córdoba, 1989, citado en Guerra, 1993, 65, nota 23.

<sup>72</sup> Sobre la capacidad de leer y escribir en el Renacimiento, ver Mignolo, 1985. Sobre la naturaleza cosmológica del orden prehispánico, ver Descola, 2005.

<sup>73</sup> Sobre las fronteras del estado Inca, y los patrones de asentamiento incaico en una provincia marginal, ver González, 1980; y Dillehay y Netherly, 1988. Para un análisis de la invasión española y del colapso del imperio incaico (1532-1539), ver Guilmartin, 1991.

<sup>74</sup> Ver Pazos, 2006; y Le Bot, 2006.

<sup>75</sup> Sobre como se acompaña o escolta a los profetas denominados karaï, en una conducta similar a la búsqueda del edén, o sociedad de la abundancia, lugar donde reina la inmortalidad y la ausencia del mal, por decir constreñimientos sociales, ver Clastres, 1990. Sobre la cosmología en la cuenca amazónica, ver Roe, 1982.

<sup>76</sup> Sobre los orígenes culturales de la observación incaica de los cielos, ver Bauer y Dearborn, 1995. Sobre la cosmología andina y el cruce de rumbos entre el cielo y la tierra, ver Urton, 1981. Sobre el calendario sideral de los Incas, ver Zuidema, 1976 y 1982. Sobre el comportamiento del zorro en la cosmología andina, ver La Riva, 2003; y sobre la conducta del zorro en la conciencia andina y en la novelística de José María Arguedas, ver Fox Lockert, 1992.

<sup>77</sup> Ver Pazos, 2006; y Le Bot, 2006.

<sup>78</sup> Sobre los mitos y el imaginario medieval en la conquista americana, ver Acosta, 1992.

---

<sup>79</sup> Grosso Lorenzo, 2004, 45.

<sup>80</sup> Entre las honrosas excepciones, debe destacarse a Chang-Rodríguez (1982). Para la transmutación de teorías jurídicas trasplantadas, ver López Medina, 2004, 22-37.

<sup>81</sup> Henríquez Ureña, 1954, 51, 112, y 220. Ver también Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Madrid: ESPASA, 1930), t. 1, p.57; y t.4, p.434.

<sup>82</sup> Sáinz de Robles (1946).

<sup>83</sup> Reyes, 1988, 58.

<sup>84</sup> Sánchez, 1973, 270-273; Goic, 1988, 247-248, y 400-405; Rama Goic, 1988, 272-275; y Rojas Garcidueñas, 1988, 233-235.

<sup>85</sup> Henríquez Ureña, 1954, 50 y 220; Anderson-Imbert, 1954, 49, 53, 77-78, y 86; y Goic, 1988, 246. Ver también, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Madrid: ESPASA, 1930), t. 1, p.533; y t.27, p.362.

<sup>86</sup> ver Cornejo Polar, 2000; y García Bedoya, 2000.

<sup>87</sup> Sánchez, 1973, 262-265.

<sup>88</sup> Zum Felde, 1941, 20; y Sánchez, 1973, 288.

<sup>89</sup> Henríquez Ureña, 1954, 50, y 220; y Anderson Imbert, 1954, 86, y 108. Ver también, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Madrid: ESPASA, 1930), t. VII, pp.1534-1535.

<sup>90</sup> Sánchez, 1973, 266-267.

<sup>91</sup> Sánchez, 1973, 267-269.

<sup>92</sup> Goic, 1988, 247. Sobre necromancia y subversión política en la sátira de Mateo Rosas de Oquendo, ver Lasarte, 1994 y 2006.

<sup>93</sup> Henríquez Ureña, 1954, 50 y 220; Anderson Imbert, 1954, 114-115; Sánchez, 1973, 273-276; Pierce, 1988, 236-240; y Beyersdorff, 1993, 225. Ver también, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Madrid: ESPASA, 1930), t.28, pp.65-66; y Diccionario de Literatura Española (Madrid: Revista de Occidente, 1953), p.357.

<sup>94</sup> Sobre la recepción del sermón barroco y la defensa de los americanos en Espinosa Medrano, ver Rodríguez Garrido 1993; y Redmond, 1998.

<sup>95</sup> Sánchez, 1973, 288-289; Beyersdorff, 1993, 225; y Chang-Rodríguez, 2001. Para la poesía en quechua, ver Beyersdorff (1993).

<sup>96</sup> Medina, 1893.

<sup>97</sup> Medina, 1958-62.

<sup>98</sup> Chang-Rodríguez, 1982.

<sup>99</sup> Zum Felde, 1941, 20.

<sup>100</sup> Sánchez, 1973, 145.

<sup>101</sup> Cabrera (1930); Torre Revello (1940); Furlong Cardiff (1944); Cornejo (1946); Draghi Lucero (1949);

---

Comadrán Ruiz (1961); y Ripodas Ardanaz (1975, 1982).

<sup>102</sup> Sánchez, 1973, 289.

<sup>103</sup> ver Elías, 1973; y Burke, 1993, citado en Grosso Lorenzo, 2004, 45. Sobre el *Tratado de Cortesía* de Carlos García (1617), ver Grosso Lorenzo, 2004, 54.

<sup>104</sup> Todorov, 1987, 231.

<sup>105</sup> Anderson-Imbert, 1954, 94. Ver Damrosch (1991, 1993). Para la poesía en quechua, ver Beyersdorff (1993).

<sup>106</sup> ver el sentido y la referencia del discurso poético según Frege, Ricoeur, Jakobson, Barthes y Bajtín, en Fernández Pedemonte, 1996; y la tesis de la diferencia hermenéutica en Gumbrecht, Kuhn y Grimminger, 1971; y en Jauss, 1972, 1989, 1992; comentados en Fokkema e Ibsch, 1988, 172; Ibsch, 1993, 287; y Miner, 1993, 186.

<sup>107</sup> ver Camarero, 1967; y Pagés, 1983. Sobre los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, ver Netanyahu, 1995. Sobre la Inquisición en Perú, ver Silverblatt, 2004. Sobre la extirpación de idolatrías en el siglo XVII peruano, ver Sánchez, 1993. Sobre la persecución de los judíos conversos en el Perú colonial, siglo XVI y XVII, ver Carcelén Reluz, 2002. Sobre la hechicería colonial en el Noroeste Argentino, ver Poderti, 2001. Sobre el proceso inquisitorial a Ángela Carranza en Lima, ver Cebrelli, 2000. Sobre el proceso a Ana de Castro por judaizante, ver Williams, 2001.

<sup>108</sup> ver Moreno de Vargas (1622), en Arriaza, 1994.

<sup>109</sup> A diferencia de Ronald Syme que califica de epicúreo a Salustio, Rudolph P. Hock lo caracteriza como típico estoico romano (Patterson, 1993, 587, nota 5). Las obras de Salustio fueron poseídas en el Virreinato del Río de la Plata por las bibliotecas del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Antonio Martínez de Luján de Vargas, y los Protectores de Indios de la Audiencia de Charcas Antonio Porlier, y Miguel Martínez de Escobar y Coronado (Ripodas Ardanaz, 1975, 534).

<sup>110</sup> repetidas por Bartolomé dei Sacchi Platina, autor del *De Principe Vero* (Francfort, 1608); Cristóbal Landino, autor de *Dialogi de nobilitate animas*, comento sopra la Comedia de Dante; y Domingo Alberti, autor de *Della vita e Virtù del V. P. Luigi La Nuzza* (Palermo, 1692).

<sup>111</sup> Mitchell, 1938, 176; Charlton, 1965, 84; Davis, 1967, 434; y Holmes, 1973, 128, citados por Skinner, 1987, I, 66, 103-104, y 263-264. Hampe Martínez (1987) revela como en la biblioteca de un funcionario de la Inquisición en el Cuzco había 17 libros sobre la antigüedad clásica, tres tratados sobre la nobleza en los reinos de España y uno sobre el régimen legal de la primogenitura (Hampe Martínez, 1987, 535 y 540). Y Sébat Pébet (1958) nos revela que el famoso contrabandista Don Manuel Cipriano de Melo poseía el libro de Luis de Molina sobre la primogenitura (Sébat Pébet, 1958, 152). Ver asimismo los trabajos de Aránguiz, Cabrera, Comadrán Ruiz, Cornejo, Cruz de Amenábar, Cutolo, Furlong Cardiff, Luque Colombes, Ripodas de Ardanaz y Torre Revello.

<sup>112</sup> Vilanova (1999) nos relata que la información mitológica era provista por una obra titulada *Biblioteca Universales*, de Salomón Gesner (1516-65).

<sup>113</sup> Sobre las ceremonias en el cristianismo, y sobre la virtud y el honor en un príncipe cristiano, ver Skinner, 1985, I, 258-261.

<sup>114</sup> Kamen, 1965, 94.

<sup>115</sup> Cutolo, 1955, 105-83; y Bataillon, 1937, v.2, capítulo 11, secciones 2 y 4. Sobre el Maestro Alejo Venegas de Busto, ver Adeva Martín, 1987.

<sup>116</sup> Torre Revello, 1944, 32-33; Peña, Francisco de Cespedes, 42; y Carbia, 1914, capítulo 1.

<sup>117</sup> Mendoza, 1954; y Crespo Rodas, 1955.

---

<sup>118</sup> Caro Baroja, 1963, 40-48; citado en Hordes, 1982, 29-30.

<sup>119</sup> Sobre Fray Juan de Robles, Pedro de Valencia y Juan y Alfonso de Valdés, ver Maravall, 1982.

<sup>120</sup> Molina, 1949, 267.

<sup>121</sup> Matienzo, 1911, 204; Levene, 1911, 27-28; Garreton, 1933, 345-350; y Peña, 1916, 25 y 33.

<sup>122</sup> Molina, 1950,

<sup>123</sup> Acuerdos, I, 409-11.

<sup>124</sup> Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires, t.II, 27ss.

<sup>125</sup> Molina, 1964.

<sup>126</sup> Cordero, 1978, 273-274.

<sup>127</sup> Molina, 1946, 521.

<sup>128</sup> Cantón, 1928, 242; Garretón, 1933, cap. XII; Furlong, 1947, 43; Molina, 1948, 57, 83 y 84; y Cordero, 19, cap. VI.

<sup>129</sup> Peña, op. cit., 9.

<sup>130</sup> AGN, Division Colonia, Sala IX, Escribanias Antiguas, v.6, f.118.

<sup>131</sup> AGN, v.6, f.120v.

<sup>132</sup> ver Tabla-I en Saguier, 1982, 361.

<sup>133</sup> Parry, 1953, 29; y Tomas y Valiente, 1976, n.101-102.

<sup>134</sup> Documentos para la historia del Virreinato del Rio de la Plata, 1912, I, 75ss.

<sup>135</sup> Acuerdos, III, 123-32.

<sup>136</sup> Acuerdos, V, 315-370.

<sup>137</sup> Ver Tabla 2 en Saguier, 1985a, 153.

<sup>138</sup> Otros ejemplos fueron los de Domingo Gribeo quien fue electo como regidor en 1605, 1607, 1611, 1613, y 1629, y como alcalde de hermandad en 1610 y 1618. Mas aun, fue designado como mayordomo de hospital en 1607, como fiel ejecutor en 1607 y 1609, y como corregidor en 1619. De igual manera, Pedro Gutierrez fue designado como contador en 1600 y elegido como regidor en 1606, 1609 y 1612, como alcalde de hermandad en 1607; como procurador general en 1611; y como alcalde de primer voto en 1629. Finalmente, fue designado como fiel ejecutor en 1606 y 1609 y como tesorero en 1615. En la misma linea, Juan de Tapia de Vargas devino alguacil mayor del Santo Oficio entre 1630 y 1642; alcalde de primer voto en 1624 y 1632; alférez real de 1631 a 1639; depositario general en 1639; y lugarteniente del Gobernador, justicia mayor y capitán a guerra en 1631 (Molina, 1964, 181-212).

<sup>139</sup> Acuerdos, III, 550-586.

<sup>140</sup> Documentos para la historia del Virreinato, 1912, 88-90.

<sup>141</sup> AGN, Division Colonia, Sala IX, Escribanias Antiguas, Protocolo de Real Hacienda, f.64v.

- 
- <sup>142</sup> AGN, Protocolo de Real Hacienda, f.620v.
- <sup>143</sup> AGN, *idem*, f.620v.
- <sup>144</sup> Garreton, 1933, 176.
- <sup>145</sup> Acuerdos, III y IV.
- <sup>146</sup> Ver Tabla 3, en Saguier, 1985a, 156.
- <sup>147</sup> AGN, v.15, f.357; y v.19, f.404.
- <sup>148</sup> AGN, v.25, f.552.
- <sup>149</sup> AGN, v.23, f.271.
- <sup>150</sup> ver Tabla 4, en Saguier, 1985a, 158-159.
- <sup>151</sup> Acuerdos, Municip., V, 290-294.
- <sup>152</sup> Acuerdos, V, 315-370.
- <sup>153</sup> Sierra, *op. cit.*, v.II, cap.VI, 260-80; y Montes, 1959, 81-159. Sobre la rebelión Comunera del Obispo Cárdenas en el Paraguay, ver Zajicová, 2001.
- <sup>154</sup> Ver Silverblatt, 2004.
- <sup>155</sup> Zorraquin Becu, 1952, 139; Molina, Hernandarias, p.160; e Israel, 1975, 124.
- <sup>156</sup> Olaechea Labayen, 1977, 501.
- <sup>157</sup> Avella Chafer, 1976, 321.
- <sup>158</sup> Acuerdos, I, 363.
- <sup>159</sup> Ugarteche, 1932, 101-105.
- <sup>160</sup> Acuerdos, II, 312; y Tiscornia, *op. cit.*, 142.
- <sup>161</sup> Acuerdos, II, 317.
- <sup>162</sup> Acuerdos, III, 519.
- <sup>163</sup> Pike, 1958, 144.
- <sup>164</sup> Peña, *op. cit.*, 49.
- <sup>165</sup> Torre Revello, 1943, 169; y Montes, *op. cit.*, 81-159.
- <sup>166</sup> Pike, 1958, 144.
- <sup>167</sup> Sobre sobornos electorales en la república romana, ver Lintott, 1990. Sobre elecciones en universidades y ordenes religiosas del medioevo, ver Malean y Lorrey
- <sup>168</sup> Acuerdos, I, 50.
- <sup>169</sup> Lynch, 1958, 203; y Haring, 1963, cap. IX.

- 
- <sup>170</sup> Sáenz Valiente, 1952, 223 ss.
- <sup>171</sup> Saenz Valiente, 1952, 249ss.
- <sup>172</sup> Sáenz Valiente, 1952, 309 ss.
- <sup>173</sup> Parry, op. coit., 46.
- <sup>174</sup> Saenz Valiente, 1952, capitulo XI.
- <sup>175</sup> Ugarteche, 1932, 101-105.
- <sup>176</sup> Ugarteche, cap.XIV, y Saenz Valiente, Los Origenes...
- <sup>177</sup> Ugarteche, cap.X.
- <sup>178</sup> Lynch, op. cit., 209.
- <sup>179</sup> ver Ingenieros, 1918, t.I.
- <sup>180</sup> ver Levene, 1924; y 1946.
- <sup>181</sup> ver Garreton, 1933.
- <sup>182</sup> ver Molina, 1949.
- <sup>183</sup> ver Sierra, 1957, 391-395; Leiva, 1971; y Funes, 1974, 159-177.
- <sup>184</sup> ver Matienzo, p.204; Levene, 1911, 27-28; y Garreton, 1933, 345-350.
- <sup>185</sup> ver Matienzo, p.204; Garreton, 1933, 347; y Ramos Mexia, 1887..
- <sup>186</sup> ver Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Rio de la Plata con los Reyes de España, t.I, 1540-1596, Madrid; Molina, 1964, 5-41; y Tiscornia, 1973, capitulo VII.
- <sup>187</sup> ver Molina, 1964, 3-27.
- <sup>188</sup> Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España (Madrid, 1918), t.II, pp27ss.
- <sup>189</sup> ver Garreton, op.cit., 353.
- <sup>190</sup> Acuerdos, II, 317.
- <sup>191</sup> ver Cordero, 273-274.
- <sup>192</sup> Acuerdos, Municip., II, 315.
- <sup>193</sup> Molina, Hernandarias, p.267.
- <sup>194</sup> Ibidem, 203-205; y Cordero, op. Cit., 210.
- <sup>195</sup> Acuerdos, Municip., IV, 42. Garreton, op. Cit., 376; y Carbia, 1914, 134.
- <sup>196</sup> Sierra, op. Cit., II, 141 y 144.
- <sup>197</sup> Sobre la Visita de Perez de Salazar, ver Canabrava, 1964, capitulo XII; y Mora Merida, 1973, 86.
- <sup>198</sup> ver Cervera, 1907, I, 361.
- <sup>199</sup> ver Peña, 1916, V.

- 
- <sup>200</sup> ver Crow, 1946, 358; y Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1859, I, 14.
- <sup>201</sup> ver Matienzo, op. Cit., 204.
- <sup>202</sup> ver Peña, op. Cit., 25-33.
- <sup>203</sup> Acuerdos, Municip., V, 315-370.
- <sup>204</sup> ver Sierra, op. Cit., 170; y Bruno, 1967, 157 y 161.
- <sup>205</sup> ver Furlong, 1944, 87.
- <sup>206</sup> ver Carbia, op. Cit., I, ch.IV; y Peña, op. cit., 49.
- <sup>207</sup> ver Peña, op. cit., 53-60.
- <sup>208</sup> ver Ugarteche, 1932, 130.
- <sup>209</sup> ver Palacio, 1954, I, 82.
- <sup>210</sup> Acuerdos, Municip., V, 291.
- <sup>211</sup> ver Cervera, op. cit., 362-376.
- <sup>212</sup> Cunningham, 1919, 420 y 423. Sobre esta particular institucion, ver Farriss, 1968, 70-83. Para propositos de comparacion, ver Logan, 1968.
- <sup>213</sup> ver Alenparte, 2000, 112.
- <sup>214</sup> Sobre Dom Pedro of Braganza y la Colonia do Sacramento, 1680-1705 , ver Rodriguez, 1958.
- <sup>215</sup> Puiggrós, 1940, 169; Bermejo de la Rica, 1920; Azarosa Gil, 1930; y Riverós Tula, 1959.
- <sup>216</sup> Puiggrós, 1940, 169; y Bermejo de la Rica, 1920.
- <sup>217</sup> "...el valor de los diversos tipos de moneda (monedas de ocho, dos, uno, medio y cuarto real) pese a su equivalencia general sufría de oscilaciones en su oferta y demanda que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. El lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos y la naturaleza de la mercadería introducida incidía en el tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú, por lo general era hecha en moneda columnaria o doble, y si en Chile en doblones de oro. Si se trataba de saldar deudas contraídas por introducir en el Alto Perú aguardiente, yerba, mulas, o textiles de las provincias abajeñas, el pago por lo general se hacía en moneda sencilla. Mas si se trataba de géneros importados la deuda se debía saldar en moneda doble. Por su naturaleza de circulante menudo, la moneda sencilla vino a sustituir o desplazar en el mercado interno a la moneda doble, la cual constituía el dinero-mercancía por excelencia para saldar las importaciones del comercio exterior. La moneda cobrada a los comerciantes del interior que compraban géneros de Castilla a crédito en Buenos Aires, era canjeada en el Alto Perú a moneda doble y remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así como base o respaldo monetaria de un circulante compuesto por moneda sencilla" (Sagüier, 1989, 289).
- <sup>218</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 83, Exp. 19.
- <sup>219</sup> Cardozo, 1959; y López, 1976.
- <sup>220</sup> AGN, División Colonia, Bandos, Libro 2, fs.20 y 21.
- <sup>221</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2.

---

<sup>222</sup> Garavaglia, 1984, 26.

<sup>223</sup> Phelan, 1960, 47.

<sup>224</sup> Ver Gandía, 1939; Mora Mérida, 1973, 164-173; y Doucet, 1977 y 1978.

<sup>225</sup> Laclau, 1978, 116.

<sup>226</sup> Ver Heers, 1977, 54.

<sup>227</sup> Phelan, 1967, 327. Ver también, Lang (1980, 227-233).

<sup>228</sup> Levene, 1915, capítulo VII; y Molina, 1966, 125.

<sup>229</sup> Ver Rodríguez Valencia, 1957; Lafuente, 1957; Shiels, 1961; y de la Hera, 1963.

<sup>230</sup> Mecham, 1934, 26 y 31.

<sup>231</sup> Sobre el mito de la división de poderes, ver Eisenmann, 1933, 190, citado en Althusser, 1964, capítulo V.

<sup>232</sup> Phelan, op.cit., 324.

<sup>233</sup> Acuerdos, X, 186-194.

<sup>234</sup> Acuerdos, XIII, 25-29.

<sup>235</sup> Garretón, op. cit., 210-218; Tapia, 1966; Saenz Valiente, 1952, capítulo VI; y Acuerdos, VII, 356; y VIII, 115, 248-363.

<sup>236</sup> Acuerdos, I, 503; y III, 365.

<sup>237</sup> Canabrava, 1944, 87-88.

<sup>238</sup> Molina, 1966, 113.

<sup>239</sup> Peña, 1916, 14.

<sup>240</sup> Acuerdos, III, 99.

<sup>241</sup> Acuerdos, III, 229.

<sup>242</sup> Tiscornia, op. cit., 146; y Garavaglia, 1978, 29-30.

<sup>243</sup> Canabrava, op. cit., 107.

---

<sup>244</sup> Peña, op. cit., 43; y Molina, 1964, 16.

<sup>245</sup> Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, t.II, 27ss.

<sup>246</sup> Sobre la Visita de Enrique Jerez en 1614, ver Cordero, 1978, 300. Sobre la Visita de Alonso Perez de SALAZAR EN 1623, VER Canabrava, capitulo XII, y Mora Merida, op. cit., 86. Sobre la Visita de Diego Martinez de Prado en 1627, ver Peña, op. cit., 34-38. Y sobre la Visita de Andres de Leon Garavito en 1630, ver Peña, op. cit., 48-49.

<sup>247</sup> Garreton, 1933, 285.

<sup>248</sup> Garreton, 1933, 363.

<sup>249</sup> En Saguier, 1984, 42, se menciona la Tabla I, de su tesis doctoral, la cual enlista los remesantes de plata a Potosi y los montos de esos envios. Tambien, el Tesorero de Buenos Aires previamente enviaba subsidios al Paraguay. En 1639, Diego Rivera, un lanchero del Paraguay, recibio del Cap. Pedro de Roxas y Acevedo \$2.100, que tuvo que ser enviado a Pedro de Lugo y Navarra, Gobernador del Paraguay (Archivo General de la Nacion, Division Colonia, Sala IX, Protocolos de Real Hacienda, f.27). Dicha Tabla-I corresponde a la Tabla 2, publicada en Saguier, 1982, 361

<sup>250</sup> Molina, Primeras experiencias..., 169.

<sup>251</sup> Molina, id., 171-172.

<sup>252</sup> Tiscornia, op. cit., 119.

<sup>253</sup> Tiscornia, op. cit., 120.

<sup>254</sup> Sierra, 1957, II, 145.

<sup>255</sup> Molina, Primeras experiencias..., 174.

<sup>256</sup> Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, t.II, 27ss.

<sup>257</sup> Baily, 1980, 32-48; y Szuchman, 1977, 24-50.

<sup>258</sup> Sobre el concepto de integración y desagregación, ver Clark, 1960, 16-17; y Kolb, 1965, 656-657. Sobre el concepto de asimilación y nacionalización, ver Price, 1969, 185-186; y Deutsch, 1966, 120-150.

<sup>259</sup> Medina, 1900; Torre Revello, 1930; y Lewin, 1939.

<sup>260</sup> Sobre los negreros en el Congo, ver Alencastro, 2005, 287-289.

<sup>261</sup> Lewin, 1958; citado en Israel, 1975, 129.

<sup>262</sup> Boxer, 1963, 81.

<sup>263</sup> Sobre el rol jugado por los flamencos y los canadienses franceses en Bélgica y Quebec, ver Loh,

---

1975, 217-247.

<sup>264</sup> Bonacich, 19, 583-594.

<sup>265</sup> Sancho de Sipranis, 1960.

<sup>266</sup> Para un contraste entre asimilación y aculturación, ver Teske y Nelson, 1974, 351-368; Dupront, 1965, 7-36; y Watchel, 1979, 135-136.

<sup>267</sup> Wagley y Harris, 1958; y Wong, 1978, 337.

<sup>268</sup> Gordon, 1964, 70-71.

<sup>269</sup> Baily, 1983.

<sup>270</sup> Pagden, 1997, 179.

<sup>271</sup> Zelin, 1979, 66-69.

<sup>272</sup> Rosa, 1974, 35-36.

<sup>273</sup> Rosa, 1974, 35; y Gelman, 1983, 280.

<sup>274</sup> Lafuente Machain, 1944, 183.

<sup>275</sup> Lima, 1980, 20.

<sup>276</sup> Cope, 1981, 39.

<sup>277</sup> Firth, 1965; y Wells, 1979, 399-415.

<sup>278</sup> las proposiciones erasmianas filtradas en los libros de Venegas del Busto y de Fray Luis de Granada, relativas a los rituales, las ceremonias y los sacramentos, en especial del matrimonio, muchas de ellas entresacadas de textos latinos, fueron identificadas en un principio como un desafío ideológico, luego fueron condenadas como herejía, y acabaron siendo prohibidas en 1612, por el Index o Indice español.

<sup>279</sup> Olaechea Labayen, 1977, 501.

<sup>280</sup> Peña, 1916, 55-60.

<sup>281</sup> Madero, 1939, 297-344.

<sup>282</sup> Acuerdos, X, 342.

<sup>283</sup> Una vez que la encomienda se volvió vacante, Gonzalez Cabezas, no obstante su "espureo" origen, le fue otorgada su administración luego de haber abonado los tributos que no se habían recaudado desde hacía un año. Su yerno, Domingo Martínez Pantoja, quien heredó esta vieja encomienda, devino también Protector de Naturales. Mas luego, en 1715, el mismo Martínez Pantoja administró una encomienda de indios Pampas que perteneció a Ana Rendon, viuda del Cap. Diego Lopez Camelo (Fernandez Burzaco, 1977, 77, y AGN, Tribunales, Protocolos, Registro 2, 1714-16, f.317).

<sup>284</sup> Cohen, 1977, 1008.

<sup>285</sup> Peña, Francisco de Cespedes, p.9; y AGN, v.11, f.523.

<sup>286</sup> Adams, 1970, 316.

<sup>287</sup> Boxer, 1974, 70.

- 
- <sup>288</sup> Zorraquin Becu, 1952, 139; Molina, 1948, 160; e Israel, op. cit., 124.
- <sup>289</sup> Medina, 1887; 1899; y 1905. Tambien ver Lea, 1908; Lewin, 1950; Wiznitzer, 1961; Liebman, 1970; y Tejado Fernandez, 1954, capitulo 6.
- <sup>290</sup> Caro Baroja, 1963, 40-48, citado por Hordes, 1982, 29-30.
- <sup>291</sup> Besio Moreno, 1939; y Slicher van Bath, 1979.
- <sup>292</sup> Lafuente Machain, 1931.
- <sup>293</sup> Ots Capdequí, 1931; y Domínguez Company, 1955, 114.
- <sup>294</sup> Sierra, 19, 148.
- <sup>295</sup> Allport, 1954, 38.
- <sup>296</sup> Labougle, 1941, 135-139; y Marfany, 1940, 22.
- <sup>297</sup> ver Siu, 1952, 34-45.
- <sup>298</sup> Acuerdos, V, 16, 286, ver Tabla I en Saguier, 1985b, 482-483
- <sup>299</sup> En Saguier, 1985b, 482-483.
- <sup>300</sup> AGN, Sala IX, Escribanias Antiguas, v.23, f.58; v.17, f.483; v.23, f.382, 59, y 64; v.19, f.298, 277, y 276; v.23, f.165; y v.9, f.517.
- <sup>301</sup> Para mayor informacion acerca del rol jugado por la fianza de pasajeros en el comercio colonial español, ver Lorenzo Sanz, 1979-80, I, 123.
- <sup>302</sup> AGN, v.23, f.200.
- <sup>303</sup> Adams, 19, 315-327.
- <sup>304</sup> Wells, 19, 399-415.
- <sup>305</sup> Cordero, 1979, 280; y Saenz Valiente, 1939, 138-141.
- <sup>306</sup> Acuerdos, IV, 131.
- <sup>307</sup> Peña, Don Francisco de Cespedes, p.9.
- <sup>308</sup> AGN, Sala IX, v.10, f.188.
- <sup>309</sup> Acuerdos, III, 356.
- <sup>310</sup> Tomado prestado de Boissevain, 1974, 156.
- <sup>311</sup> Este Censo no es valido para generalizaciones mas extensas. Por cuanto en ese año en particular el trafico de esclavos ya habia colapsado y los comerciantes Portugueses itinerantes habrian huido a ciudades mas prosperas.
- <sup>312</sup> La Tabla II, publicada en Saguier, 1985b, 487, incluye dos tipos de columnas, una encabezada con numeros y otra con letras. Las columnas encabezadas con numeros consisten en informacion cruda. Incluye la siguiente informacion: fechas de nacimiento y de arribo del comerciante, la ocupacion declarada al momento del arribo, el monto de la dote, los años de actividad mercantil, el numero y monto de las transacciones crediticias notarialmente registradas relativas a adelantos

---

monetarios para el tráfico de esclavos, el número de esclavos fiscal y censalmente declarados, y finalmente, el monto de activos declarados en el Censo de 1643. Las columnas encabezadas con letras consisten en cálculos basados en previas columnas. La columna A ilustra el número de años entre el arribo del comerciante y la primera transacción notarial registrada; la columna B ilustra el número de años entre la primera y la última transacción registrada; y las columnas C y D incluyen la edad del comerciante al momento del Censo y al tiempo de la última transacción registrada y la fecha del Censo.

<sup>313</sup> Gordon, 19, 80.

<sup>314</sup> Carbia, 1914, 60; y Garreton, 1933, 332-333.

<sup>315</sup> Vila Vilar, 1979, 183-185.

<sup>316</sup> Besio Moreno, op. cit., 383.

<sup>317</sup> ver Tabla III, en Saguier, 1985b, 489.

<sup>318</sup> Lafuente Machain, Los portugueses...

<sup>319</sup> Gammalsson, 1980.

<sup>320</sup> Este fue el caso, en 1705, cuando Pascual Salvatierra y María Montalvo, una pareja de pequeños chacareros del pago de Monte Grande, acordaron casar su hija María con Marcos, un mulato de 21 años de edad, hijo de Isabel, mulata, que era casi blanco, de linda cara y rasgos, de larga cabellera que casi cubría sus hombros, de cuerpo bien formado, y derecho de pies y de piernas" recientemente liberado por Magdalena Valero (AGN, v.65, f.467.).

<sup>321</sup> Molina, 1956, 177-178.

<sup>322</sup> Una vez que enviudo de Ramos, Doña Ana contrajo segundas nupcias con Luis García Señero y murió en 1697 a la edad de 84 años (AGN, v.31, f.225; v.54, f.300; y v.56, f.345).

<sup>323</sup> Sobre el reformismo socio-agrario de Pedro de Valencia, ver Maravall, 1982, 247-304.

<sup>324</sup> General Alonso de Sotomayor en 1583, General Martínez de Leyba en 1601, General Mosquera en 1605, y Cap. Francisco de Mandojana en 1623. Para el tránsito de los esclavos desde Angola a Buenos Aires, ver Alencastro, 2000.

<sup>325</sup> Trelles, 1872, 22.

<sup>326</sup> Lima, 1980, 20.

<sup>327</sup> Lafuente Machain, 1944, 183.

<sup>328</sup> Vedoya, 1973, 428.

<sup>329</sup> Molina, 1964, 333.

<sup>330</sup> Cervera, op. cit., I, 361.

<sup>331</sup> AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.1, f.470.

<sup>332</sup> AGN, v.19, f.411.

<sup>333</sup> Entre ellos encontramos: Amador Vaez de Alpoin, Juan Barragan, Gaspar de Gaete, Bernabe Gonzalez Filiano, Antonio de Govea, Mateo Leal de Aayala, Diego Lopez Camelo, Melchor Maciel, Juan de Matias de Balcazar, Mateo de Monserrate, Blas de Mora, Juan Quintero, Antonio de Rocha Bautista, Pedro de Roxas y Acevedo, Marcos de Sequera, Juan de Tapia de Vargas, Cristobal de Torres, y Luis de Villegas.

- 
- <sup>334</sup> AGN, Seccion Tribunales, Protocolos, Registro 2, f.1.
- <sup>335</sup> AGN, Registro 3, 1728, f.68.
- <sup>336</sup> AGN, v.45, f.255.
- <sup>337</sup> AGN, Division Colonia, Sala IX, Protocolos de Lujan, v.3, f.537v.
- <sup>338</sup> AGN, v.3, f.428v.
- <sup>339</sup> AGN, v.11, f.309.
- <sup>340</sup> AGN, v.12, f. 1o1v.
- <sup>341</sup> AGN, v.12, f.191v.
- <sup>342</sup> AGN, v.13, f. 135v.
- <sup>343</sup> AGN, v.18, f.196; v.23, f.365 y v.24, f.7.
- <sup>344</sup> AGN, v.23, f.354.
- <sup>345</sup> AGN, v.19, f.60; v.25, f.27v. y 40v.
- <sup>346</sup> AGN, v.22, f. 466v.
- <sup>347</sup> AGN, v.20, f.315v.; y v.25, f.58.
- <sup>348</sup> AGN, v.15, f.34.
- <sup>349</sup> AGN, v.11, f.539; y v.18, f.250.
- <sup>350</sup> AGN, v.18, f.89v.
- <sup>351</sup> AGN, v.24, f.512.
- <sup>352</sup> AGN, v.27, f.538.
- <sup>353</sup> AGN, v.20, f.37 y 38.
- <sup>354</sup> AGN, v.19, f.471.
- <sup>355</sup> AGN, v.25, f.102.
- <sup>356</sup> Cordero, 1978, 183-186.
- <sup>357</sup> Acuerdos, III, 198.
- <sup>358</sup> Acuerdos, VIII, 264.
- <sup>359</sup> AGN, v.8, f.29; y v.10, f.160.
- <sup>360</sup> AGN, v.2, f.1057; v.6, f.172; y v.7, f.6.
- <sup>361</sup> Ochoa de Eguileor, 1977, 28-37.
- <sup>362</sup> Cushner, 1980, 44.

---

<sup>363</sup> Informacion procedente de mi banco de datos privado.

<sup>364</sup> Johnson, 1978, 645.

<sup>365</sup> Viotti da Costa, 1966, 254-256 y 442, cit. en Hunold Lara, 1988, 101.

<sup>366</sup> Ver Saguier, 1989, 45-54.

<sup>367</sup> Para el caso de Lima, ver Hünefeldt, 1979; para el de La Habana, ver Deschamps Chapeaux (1969); para el de Buenos Aires, ver Johnson (1978); para el de Popayán ver Rodríguez J. (1980), y para el de Asunción del Paraguay, ver Williams (1974, 1987).

<sup>368</sup> La frecuencia con que se daba esta realidad lo atestigua la capacidad de los libertos de adquirir bienes inmuebles. Ver Rosal, 1988.

<sup>369</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

<sup>370</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>371</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>372</sup> Bravo Acevedo, 1986, 31.

<sup>373</sup> Fuente; Saguier, Eduardo R.: Catastro de Mano de Obra Esclava de Buenos Aires (1736-1820) [Obra inédita].

<sup>374</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.14, Exp.323, fs.22v.

<sup>375</sup> facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>376</sup> Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>377</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1732, fs.8v.

<sup>378</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-12, Exp. 14, fs. 104.

<sup>379</sup> Ibidem.

<sup>380</sup> Ver su biografía en Lux-Wurm, 1979.

<sup>381</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-16, Exp. 1, fs. 108.

<sup>382</sup> Idem, fs. 127v.

<sup>383</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.128, Exp.1, fs.40v.

<sup>384</sup> Ibidem.

---

<sup>385</sup> Ibidem.

<sup>386</sup> Ibidem.

<sup>387</sup> Ibidem.

<sup>388</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, año 1784, fs.111).

<sup>389</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1808, fs.102.

<sup>390</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.11, Exp.16, fs.40 y 49v.

<sup>391</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-17, Exp. 15, fs. 20.

<sup>392</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-17, Exp. 15, fs. 20.

<sup>393</sup> Idem.

<sup>394</sup> Idem.

<sup>395</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.8.

<sup>396</sup> Sucesión de María Dolores Sebicos, AGN, Sucesiones, Leg. 8418, fs. 50.

<sup>397</sup> Idem.

<sup>398</sup> Idem.

<sup>399</sup> Idem.

<sup>400</sup> Idem.

<sup>401</sup> Idem.

<sup>402</sup> Idem,

<sup>403</sup> Idem.

<sup>404</sup> Idem.

<sup>405</sup> Venta del Dr. Agustín Pío de Elía a Agustín Wright (AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183).

<sup>406</sup> Ibidem.

<sup>407</sup> Ibidem.

<sup>408</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. O-4, Exp. 23.

<sup>409</sup> Idem.

<sup>410</sup> Idem.

<sup>411</sup> Idem.

<sup>412</sup> Idem.

<sup>413</sup> AGN, Sucesiones, Leg.7261, fs.31-34v.

---

<sup>414</sup> con el asesoramiento de un abogado cuya identidad no me ha sido posible obtener.

<sup>415</sup> AGN, Sucesiones, Leg.7261, fs.31-34v.

<sup>416</sup> Ibidem.

<sup>417</sup> Ibidem.

<sup>418</sup> Ibidem.

<sup>419</sup> Ibidem.

<sup>420</sup> Ibidem.

<sup>421</sup> Ibidem.

<sup>422</sup> Ibidem.

<sup>423</sup> AGN, Tribunales, Sucesiones, Leg. 8418, fs. 12.

<sup>424</sup> hijo de Gonzalo Conget y de Ana María Aguirre, y sobrino político de Gaspar de Bustamante y de Juan Antonio Verdún de Villaysán (FB, I, 47).

<sup>425</sup> facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>426</sup> Antonio José de Aguirre y Juana Leal de Ayala (FB, I, 47).

<sup>427</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 12, fs. 47v.

<sup>428</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. B-4, Exp. 8, fs. 42.

<sup>429</sup> Gallego, natural de San Tenjo, marido de María Tadea de la Quintana, viuda de Manuel González, e hija de Pedro José de la Quintana y de Juana Bautista Dunda y Hernández (FB, I, 279).

<sup>430</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-14, Exp. 5, fs. 42.

<sup>431</sup> Idem.

<sup>432</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-14, Exp. 5, fs. 42.

<sup>433</sup> AGN, Protocolos, Reg. 5, 1804, fs. 54v.

<sup>434</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1785, fs.255v.

<sup>435</sup> María de la Paz y su hijita fueron manumitidos en 1804 por Antonio José Da Silveyra en \$350, recibidos de manos de dos bienhechores (AGN, Protocolos, Reg.3, 1804, fs.90). La mulatilla María del Carmen, hija de Atanasia, fué manumitida en 1801 por María Luisa Igarzábal en \$180, recibidos "...de manos de su padre, cuyo nombre se omite por súplica de este mismo" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.322v.).

<sup>436</sup> La mulata Francisca, de 10 años, fué manumitida en 1783 por Felipe Cevallos "...atendiendo a que la reconoce por mi hija natural" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1783, fs.149). El mulato Cayetano José, de 7 años, hijo de la mulata María Antonia, fué manumitido en 1766 por María Beresosa y Contreras "...en atención a que Benito Ximénez dice ser su hijo natural" (AGN, Protocolos, Reg.6, 1766, fs.327). Juan León, de 20 años, y Paula, de 16, fueron manumitidos por Mauricio Almirón, vecino de la Pesquería, "...por cuanto he tenido una negra Ana y con ella he vivido en ilícita amistad" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1796, fs.337v.).

---

<sup>437</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.148v.

<sup>438</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1808, fs.106v.

<sup>439</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1809, fs.288.

<sup>440</sup> mujer de Miguel Lara (VM, 1988, ítem 1357).

<sup>441</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 81, fs.216.

<sup>442</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1772, fs.44.

<sup>443</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1806, fs.145v.

<sup>444</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1808, fs.293v.

<sup>445</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1810, fs.11v.

<sup>446</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1810, fs.198v.

<sup>447</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1811, fs.127.

<sup>448</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.

<sup>449</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1801, fs.166v.

<sup>450</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.32.

<sup>451</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.27.

<sup>452</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1802, fs.9v.

<sup>453</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1804, fs.139.

<sup>454</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1800/01, fs.245.

<sup>455</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1805, fs.90v.

<sup>456</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1805, fs.387v.

<sup>457</sup> Lynch, 1987, 427.

<sup>458</sup> Frazer, 1951, 658; y Caro Baroja, 1965.

<sup>459</sup> Canby, 1978.

<sup>460</sup> Hijo de Domingo Reje Corvalán y Chirinos y de María Manuela Sotomayor y Videla, casado en primeras nupcias en 1800 con Benita Merlos y Basavilbaso, y en segundas nupcias con Manuela Ramos Mexía Ross (FB, II, 171)..

<sup>461</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.55. Antonio María, esclavo de Doña Juana María Martínez de Rosas declaró en Mayo de 1812 que Bernardo, esclavo de Francisco Aragón, le propuso "...que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos y que esta la tenían usurpada [retenida] aquí los Sres. Jueces, de lo que él tenía constancia por unos papeles que tenía en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos hacer que se les declarase, para lo cual convenía juntarse todos, abanzar el cuartel, y Sala de Armas, tomar éstas, y dar un avance a los Sarracenos, quitándoles el dinero, y género que tuviesen y prenderles, y luego presentarse a las Justicias para que les declarase la libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al Superior Gobierno" (Ibíd., fs.43).

---

<sup>462</sup> Héroe de Pasco y La Florida, dueño de la estancia de Pampa Grande, suegro del Gobernador de Salta Evaristo Uriburu y Hoyos, de Baltazar Usandivaras, y del Dr. Martínez (Fernández Lalanne, 1989, 54). Fué testigo de los escandalosos abusos y vejámenes, con que los gobernadores y los párrocos agobiaban a la población indígena, y elevó circunstanciados informes al Virrey que le atraieron el odio del Gobernador Intendente de Cochabamba Francisco de Viedma (Cutolo, I, 211).

<sup>463</sup> Frías, 1971, 80.

<sup>464</sup> Andrews, 1980, chapter 6.

<sup>465</sup> Córdova, 1972, 274.

<sup>466</sup> Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1718 el Cabildo resuelve que el Alguacil Mayor notifique a "...los indios, mulatos, y mestizos zapateros, sastres, y carpinteros para que baian a segar trigo a las chacras pena de que seran castigados con todo rigor y también que se les obligue a que traigan boleta de la persona con que hubieren segado". El 24 de diciembre de 1720 hay citación general "...para que tomen parte en la siega a los negros, mulatos libres, mestizos, zapateros, sastres, y carpinteros que no fueren españoles para que ayuden a ella y en particular a las pobres viudas. Cometieren esta diligencia a dicho Sr. Alguacil Mayor para que los cite para el 30 de diciembre que ocurran a esta sala para repartirlos". El 12 de enero de 1752 y el 11 de diciembre de 1792 el alcalde de primer voto y el síndico procurador general, respectivamente, propusieron que en atención a ser tiempo de siega y que por falta de gente que hay en las chacras para el trabajo y por esta causa se pueden perder los trigos, se le suplique al Sr. Gobernador mande romper bando, para que cesen todas las obras, y oficios que hay en esta ciudad, y que so pena de meses de presidio les compela a todos salgan a trabajar en las cosechas" (Halperín Donghi, 1961, 38).

<sup>467</sup> García Soriano, 1969, 109-129; Balán, 1976, 201-235; y Guy, 1978, 135-145. Ver también Bock y Iutaka, 1969; y Muñoz, 1974.

<sup>468</sup> Molina, 1948, 117-118.; Cervera, 1907, I, 352; Acuerdos, III, 192; Peña, 1916, 9, 12 y 44; Acuerdos, IX, 283, 473, 503; y XI, 172; y Garreton, 1933, capitulos IX y X.

<sup>469</sup> Sobre Mayordomos de Encomienda, ver Mayo, 1978, 27-59.

<sup>470</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1986, 97. Las tasas de población real a partir de las cuales los argumentos siguientes se elaboraron fueron mucho mas bajas que las tasas mostradas aquí. En efecto, estas tasas fueron calculadas de las cifras de migración indígena que correspondieron a la primera mitad del siglo XVII (ver dicha Tabla 1) y de las cifras censales, para cada encomienda, que fueron recolectadas en 1672. El hecho de que este ultimo censo fue practicado luego de una epidemia general y que la represión de la Rebelión Calchaquí hubiera diezñado la población indígena muestra que el denominador de dichas tasas era mas bajo que en la primera mitad del siglo. Pero si uno guarda en mente que el propósito de este ultimo censo era el de convencer al Rey de España de la extrema despoblación del área y la consecuente necesidad de mano de obra esclava africana, entonces la subestimación voluntaria de la población indígena que sigue socava la confiabilidad de este censo aun mas, e indirectamente infla estas tasas. (ver Ravignani, 1932, 287ss.).

<sup>471</sup> Saguier, 1982, Tabla 82, 527.

<sup>472</sup> Solveyra, 1974a, 213-238; y Solveyra, 1974b, 24.

<sup>473</sup> Mellafé Rojas, 1968, 310.

<sup>474</sup> ver Urbano Salerno, 1973, 869-891.

<sup>475</sup> Acuerdos, Municip. VII, 50.

<sup>476</sup> ver Tablas 2 y 3 en Saguier, 1986, 98-102, así como Saguier, 1982, Tabla 65, 502.

<sup>477</sup> Saguier, 1982, III, 426.

---

<sup>478</sup> AGN, v.11, f.183; y v.12, f.95.

<sup>479</sup> AGN, v.11, f.241; y v.12, f.85.

<sup>480</sup> Assadourian, 1983, 51.

<sup>481</sup> AGN, v.1, f.685; y v.32, f.447.

<sup>482</sup> AGN, v.1, f.679; y v.32, f.422v.

<sup>483</sup> Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, t.II, 172.

<sup>484</sup> Acuerdos, XIV, 62.

<sup>485</sup> Acuerdos, XV, 343-396.

<sup>486</sup> Ya en 1602, en Cordoba, 19 licencias fueron requeridas por los Españoles para conducir 29 indios de diferentes encomiendas a Buenos Aires para servir en el trafico de carretas. En todos los casos, el numero de indios no excedia la veintena cada vez. La totalidad generalmente consistia de indios alquilados a no-encomenderos (Solveyra, op. cit.).

<sup>487</sup> Acuerdos, Municip., III, 426.

<sup>488</sup> AGN, v.11, f.538; y v.12, f.320

<sup>489</sup> AGN, v.11, f.147; y v.12, f.147v.

<sup>490</sup> AGN, v.12, f.47; y v.13, f.65.

<sup>491</sup> AGN, v.26, f.516v.; y v.27, f.109v.

<sup>492</sup> AGN, v.1, f.685; y v.32, f.447.

<sup>493</sup> AGN, v.21, f.435v.; v.23, f.230v.; v.24, f.523; y v.25, f.244.

<sup>494</sup> Acerca de un proceso similar ocurrido en la campaña porteña dieciochesca, ver Halperin Donghi, 1975, 457-458, citado en Mayo, 1984, 615.

<sup>495</sup> Borah, 1949, 42.

<sup>496</sup> Mayo, 19, 612-615; y Ramirez-Horton, 1977, 315.

<sup>497</sup> Saguier, 1982, Tabla 84, 530.

<sup>498</sup> AGN, v.17, f.747v.

<sup>499</sup> Azara, 1949, 9; citado en Mayo, 19, 615.

<sup>500</sup> Saguier, 1982, Tabla 85, p. 532.

<sup>501</sup> AGN, v.13, f.135v.

<sup>502</sup> AGN, v.21, f.208.

<sup>503</sup> AGN, v.24, f.54.

<sup>504</sup> AGN, v.12, f.101.

<sup>505</sup> Saguier, 1982, Tabla 90, 541.

---

<sup>506</sup> ver Tabla 4 en Saguier, 1986, 103

<sup>507</sup> AGN, v.27, f.563.

<sup>508</sup> Saguier, 1982, Tabla 90, 541.

<sup>509</sup> Saguier, 1986, 85.

<sup>510</sup> AGN, v.23, f.289v.; y v.24, f.27 y 178.

<sup>511</sup> AGN,vv., f.676v.

<sup>512</sup> AGN, v.24, f.15, 57, 59, 174, y 265.

<sup>513</sup> AGN, v.27, f.234 y 235.

<sup>514</sup> AGN, v.27, f.75; y v.1, f.659.

<sup>515</sup> ver Tabla 5 en Saguier, 1986, 104

<sup>516</sup> Saguier, 1986, 104.

<sup>517</sup> Solberg, 1974, 127.

<sup>518</sup> Slatta, 1980, 453.

<sup>519</sup> Rodriguez Molas, 1968, 114.

<sup>520</sup> Idem, 115.

<sup>521</sup> Brenner, 1977.

<sup>522</sup> En 1586, el Gobernador Juan Ramirez de Velazco escribio al Rey que en los cuatro años previos mas de 4.000 indios fueron enviados de Tucuman a Charcas. Ver Levillier, 1920, 143-144; y Zorraquin Becu, 1965, 317-324.

<sup>523</sup> Ver Tabla 1, en Saguier, 1986, 97.

<sup>524</sup> Saguier, 1986, 97.

<sup>525</sup> Saguier, 1986, 97.

<sup>526</sup> Saguier, 1982, Tabla 83, 528.

<sup>527</sup> Jara, 1956, 184; y Jara, 1965, 52.

<sup>528</sup> Jara, 1956, 198.

<sup>529</sup> AGN, v.11, f.264; y v.12, f.66

<sup>530</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1986, 97.

<sup>531</sup> Actas del Cabildo de la Ciudad de Santa Fe. Primera Serie, t.II, 1590-1595, p.194.

<sup>532</sup> Cervera, 1909, 266 y 290; y Torre Revello, 1943, 151, 160 y 171.

<sup>533</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1986, 97.

- 
- <sup>534</sup> Maeder, 1974; Monteiro, 1994; y Novinsky, 1998.
- <sup>535</sup> Ravignani, op. cit., 207.
- <sup>536</sup> Saguier, 1982, Tabla 83, 528.
- <sup>537</sup> Zinny, 1920-21, I, 109; y Torre Revello, 1944, 13; Torre Revello, 1958, 229-240; Marfany, 1940, 33 y 36; y Molina, Hernandarias, 265-271.
- <sup>538</sup> Mac Leod, 1979, 80.
- <sup>539</sup> Banco de Datos del autor.
- <sup>540</sup> Saguier, 1982, Tabla 65, 502.
- <sup>541</sup> Susnik, 1965, 125; y Mora Merida, op. cit., 145-150.
- <sup>542</sup> Susnik, op. cit., 135; Ripodas Ardanaz, 1977, 370-378.
- <sup>543</sup> Esquivel y Navia, 1980, II, 75.
- <sup>544</sup> Acuerdos, II, 137.
- <sup>545</sup> Tandeter, op. cit.
- <sup>546</sup> Tandeter, op. cit.
- <sup>547</sup> Portes, 1978, 14.
- <sup>548</sup> Orlove, 1976, 136.
- <sup>549</sup> Sierra, 1957, II, cap. VI, 260-280; y Montes, 1959, 81-159.
- <sup>550</sup> Davies, 1969, 671.
- <sup>551</sup> MacLeod, 19, 80.
- <sup>552</sup> Bruno, II, 190 y 204.
- <sup>553</sup> Idem, op. cit., 195.
- <sup>554</sup> Córdova, 1972, 274.
- <sup>555</sup> Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1718 el Cabildo resuelve que el Alguacil Mayor notifique a "...los indios, mulatos, y mestizos zapateros, sastres, y carpinteros para que baian a segar trigo a las chacras pena de que seran castigados con todo rigor y también que se les obligue a que traigan boleta de la persona con que hubieren segado". El 24 de diciembre de 1720 hay citación general "...para que tomen parte en la siega a los negros, mulatos libres, mestizos, zapateros, sastres, y carpinteros que no fueren españoles para que ayuden a ella y en particular a las pobres viudas. Cometieren esta diligencia a dicho Sr. Alguacil Mayor para que los cite para el 30 de diciembre que ocurran a esta sala para repartirlos". El 12 de enero de 1752 y el 11 de diciembre de 1792 el alcalde de primer voto y el síndico procurador general, respectivamente, propusieron que en atención a ser tiempo de siega y que por falta de gente que hay en las chacras para el trabajo y por esta causa se pueden perder los trigos, se le suplique al Sr. Gobernador mande romper bando, para que cesen todas las obras, y oficios que hay en esta ciudad, y que so pena de meses de presidio les compela a todos salgan a trabajar en las cosechas" (Halperín Donghi, 1961, 38).
- <sup>556</sup> ver Pastore, 1990 y 1991.
- <sup>557</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes, para circular de pago en pago, la cual perduró legalmente hasta Caseros.

---

<sup>558</sup> otorgadas por el Consejo de Gracia y Justicia del Consejo de Indias.

<sup>559</sup> ver Saguier, 1994c.

<sup>560</sup> Sobre la relación entre imperios y entrepôts, ver Israel, 1990.

<sup>561</sup> Eklund, 1980, 383; y Tortella Casares, 1986.

<sup>562</sup> Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas. La primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz (Bakewell, 1976, 319).

<sup>563</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

<sup>564</sup> ver Saguier, 1993e, Tabla I, 162-165.

<sup>565</sup> Rogowski, 1987, 1130.

<sup>566</sup> Rogowski, 1987, 1130.

<sup>567</sup> Cabat (1971), Greenow (1979, 1980), Gudmundson (1983), Schwaller (1985), Levaggi (1986), J. Fisher (1990), y últimamente Jiménez-Pelayo (1991) y Burns (1991).

<sup>568</sup> Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y obras pías estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones en efectivo o en inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo XVI (Bauer, 1971, 78-82).

<sup>569</sup> como Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990) y últimamente Jiménez-Pelayo (1991).

<sup>570</sup> Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642. El mismo argumento ensayan para España Álvarez Vázquez (1978) y Sánchez González (1991).

<sup>571</sup> Bauer, 1983, 732.

<sup>572</sup> Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de Cervantes Bello (1986).

<sup>573</sup> Romano (1966).

<sup>574</sup> para México: Brading (1975), Morin (1979), Greenow (1980), Super (1983), Borchart de Moreno (1984) y Pérez Herrero (1988); para el Perú: Chocano (1982), Pérez Canto (1985), Brown (1986), Laviana Cuetos (1987) y Contreras (1990); para Chile: Mellafe (1959); para el Paraguay: Whigham (1991); y para el Río de la Plata: Müller (1987).

<sup>575</sup> Sin embargo, asimilar las operaciones de crédito privado del Antiguo Régimen a nuestras "monedas escriturales" actuales era, para Vilar (1969), imposible, si no se le tomaba con cautela. En el caso del crédito de venta, mutuo, o fiado, pese a ser endosable, no era convertible en circulante, según Vilar, por padecer de fecha de vencimiento, circular en cifras desmedidas, y no ser divisible o fraccionable. Al igual que hoy las tarjetas de crédito no son implementadas en las investigaciones que refutan la teoría cuantitativa del dinero, tampoco podríamos considerar para este propósito al fiado y las libranzas. No obstante, para autores como Flynn (1980), el padecer de fecha de vencimiento no le impedía al dinero escriturario convertirse en un circulante transitorio, que por la ley de Gresham desplazaba de la circulación doméstica en el mercado mayorista a la moneda metálica.

<sup>576</sup> En el caso particular de la Nueva España, de no haber estado acompañada por un proceso de proto-

---

industrialización y por un incremento en la circulación del stock de moneda, la inflación de precios no se habría producido (Ouweneel y Bijleveld, 1989, 500).

<sup>577</sup> "...Estas operaciones de descuento, hechas a una determinada tasa de interés, deben haber alentado las importaciones de mercancías Europeas y de esclavos Africanos, la producción minera, la recolección de frutos (cueros y yerba) y la consiguiente salida al exterior de metal y de frutos de la tierra (cueros), así como afectado el monto de los capitales descontados en dichas cesiones de deudas. Los medios de pago no metálicos emitidos por particulares deben haber sustituido, en gran medida, al oro y plata en circulación" (Saguier, 1993c y 1994b). Con respecto a la llamada crisis del siglo XVII, Bakewell (1976) se preguntaba -- sin alcanzar a vertebrar una respuesta-- para el caso de la Nueva España "...¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?". Para responder a su interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas. La primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz (Bakewell, 1976, 319). Sin embargo, la respuesta habría que hallarla en el rol jugado por el crédito comercial.

<sup>578</sup> Goldstone (1984) sostuvo que el elemento clave del problema suscitado entre la población y la oferta monetaria eran las proporciones que resultaban de dividir la velocidad de circulación del dinero (V) por el volumen de bienes comercializados (T) y no la proporción entre la oferta de moneda (M) y el nivel general de precios (P) (Goldstone, 1984, 1141).

<sup>579</sup> Moutoukias, 1988, 175-187

<sup>580</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>581</sup> Schumpeter, 1954, 314.

<sup>582</sup> Molina, 1948, 117-118; Cervera, 1907, I, 352; Peña, 1916, 9, 12 y 44; y Garretón, 1933.

<sup>583</sup> Hamnet, 1971, 117.

<sup>584</sup> Hilferding, 1960, 301.

<sup>585</sup> Bowser, 1974, 35.

<sup>586</sup> Assadourian, 1983, 72.

<sup>587</sup> Vila Vilar, 1973, 585.

<sup>588</sup> Otte y Ruiz-Burruecos, 1963, 3-31; y Lapeyre, 1967.

<sup>589</sup> Coni, 1941, 94.

<sup>590</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.

<sup>591</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.

<sup>592</sup> Vila Vilar, 1973, 587.

<sup>593</sup> ver Tabla 3 en Saguier, 1987, 135-136.

<sup>594</sup> AGN, v.2, f.2031v., 3.013v., y 3.011v.; y v.3, f.17, 116, 154, 268v., 272, 502v., y 515v.

- 
- <sup>595</sup> Vila Vilar, 1973, 568.
- <sup>596</sup> Gelman, 1983, 139; Torres, 1984, 68.
- <sup>597</sup> Acuerdos, I, 203, 395 y 398.
- <sup>598</sup> Birmingham, 1966, 83.
- <sup>599</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.
- <sup>600</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.
- <sup>601</sup> ver Tabla 3 en Saguier, 1987, 135-136.
- <sup>602</sup> Bowser,, op. cit., 36.
- <sup>603</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.
- <sup>604</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.
- <sup>605</sup> Canabrava, op. cit., 150.
- <sup>606</sup> Birmingham, op. cit., 85.
- <sup>607</sup> Scheuss de Studer, 1958, 93.
- <sup>608</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.
- <sup>609</sup> Sobre la guerra de los Treinta Años, ver Wedgwood, 1992.
- <sup>610</sup> Ver Tabla 5, y Bakewell, 1975, Tabla 1.
- <sup>611</sup> ver Tabla 5 en Saguier, 1987, 138-139.
- <sup>612</sup> ver Tabla 5 en Saguier, 1987, 138-139.
- <sup>613</sup> Lynch, 1969; Cross, 1978, 154.
- <sup>614</sup> ver Tabla 3 en Saguier, 1987, 135-136.
- <sup>615</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.
- <sup>616</sup> ver Tablas 1 y 2 en Saguier, 1987, 129-134.
- <sup>617</sup> Bowser, op. cit., 33.
- <sup>618</sup> ver Tablas 1 y 2 en Saguier, 1987, 129-134.
- <sup>619</sup> Assadourian, Chile y el Tucuman, 75.
- <sup>620</sup> Canabrava, op. cit., 147. Cadornega devino luego en el Cronista de la historia Angoleña, escribió en 1680 la Historia Geral das guerras angolanas.
- <sup>621</sup> Levene, 1962, 177.
- <sup>622</sup> Scheuss de Studer, op. cit., 95.
- <sup>623</sup> Peña, Don Francisco de Cespedes...

---

<sup>624</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.

<sup>625</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.

<sup>626</sup> ver Tabla 4 en Saguier, 1987, 137.

<sup>627</sup> ver Tabla 3 en Saguier, 1987, 135-136.

<sup>628</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.

<sup>629</sup> ver Tabla 1 en Saguier, 1987, 129-131.

<sup>630</sup> ver Tablas 1 y 2 en Saguier, 1987, 129-134.

<sup>631</sup> Acuerdo para el manifiesto de esclavos que hizo el Visitador Juan de Palacio en 5 de mayo de 1639, Documento n.52, Registro Estadístico de Buenos Aires, 1866, t.II, p.56.

<sup>632</sup> Scheuss de Studer, op. cit., 97.

<sup>633</sup> Para el Gran Alzamiento, ver Montes, 1959, 81-159; y Fortuny, 1966.

<sup>634</sup> ver Banco de Datos del comercio esclavo.

<sup>635</sup> ver Tabla 2 en Saguier, 1987, 132-134.

<sup>636</sup> ver Tabla 5 y Bakewell, op. cit., Tabla 1.

<sup>637</sup> Lohmann Villena, 1976, 579-639.

<sup>638</sup> AGN, v.23, f.333v.; y v.30, f.394.

<sup>639</sup> Garcia, La Ciudad Indiana,

<sup>640</sup> ver Saguier, 1982, Tabla 36.

<sup>641</sup> Silva, 1965, 143.

<sup>642</sup> Dominguez Ortiz, 1979, 813.

<sup>643</sup> "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).

<sup>644</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

---

<sup>645</sup> Entre Levene (1927) y Muñoz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada en que el primero sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de una trayectoria secular, mientras el segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de un proceso" (Muñoz Pérez, 1947, 618; y Levene, 1952, 229). Debo la referencia de este debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

<sup>646</sup> Assadourian, 1983, 127.

<sup>647</sup> Con relación al seguro marítimo, ver De Roover, 1945; y Wedovoy, 1966; con relación a la contabilidad, ver Yamey, 1949; y con relación a la evolución de la jurisdicción comercial en el Río de la Plata, ver Nortman, 1952.

<sup>648</sup> Ver Saguier, 1993a, y 1993c.

<sup>649</sup> Puiggrós, 1940; Wedovoy, 1960, 1966; Tjarks, 1962; Villalobos, 1968; Socolow, 1978; Garavaglia, 1983, 1985; Malamud, 1985; Müller, 1987; Amaral, 1990; Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990; Punta, 1992; y Tandeter, 1992.

<sup>650</sup> los que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial.

<sup>651</sup> por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor.

<sup>652</sup> por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos.

<sup>653</sup> El énfasis que Tandeter (1993) otorga a los estudios fundados en fuentes fiscales, entre las investigaciones interrumpidas por las dictaduras militares (Tandeter, 1993, 805), va en desmedro de aquellas investigaciones centradas en las fuentes notariales y judiciales, que también se vieron frustradas por dichas dictaduras y por la desidia con que fueron y son tratados los Archivos históricos.

<sup>654</sup> Levene, 1962, 262; y Marilúz Urquijo, 1987, 61.

<sup>655</sup> un comerciante flamenco.

<sup>656</sup> Apéndices IV y V de Bernal (1992), y Bernal, 1992, 420.

<sup>657</sup> En el cómputo del Apéndice A-I tengo registrados 183 comerciantes gaditanos.

<sup>658</sup> seleccionados bajo el triple criterio del mayor número de escrituras de riesgo acreditadas, mayores cuantías invertidas en la financiación y mayor permanencia temporal (Bernal, 1992, 458).

<sup>659</sup> Existen trabajos sobre algunas casas comerciales gaditanas como el de Ruiz Rivera (1976) sobre los Ustáriz y San Ginés y el de Molas Ribalta (1975) sobre Juntas y corporaciones mercantiles, y otros sobre casas comerciales sevillanas, como los de Álvarez Pantoja (1986, 1989) sobre el Marqués de Palomares de Duero y sobre Juan Pedro Jacave.

<sup>660</sup> Borchart de Moreno, 1984, 118; y Bernal, 1992, 483.

<sup>661</sup> Natural de la Higuera o Vigueras, La Rioja, Arzobispado de Calahorra, hijo de Diego del Arco y de Catalina de Soldevilla; marido de Magdalena Trillo, hija de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas (Fernández de Burzaco, I, 141; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 3307). Socio de Pedro de Lea.

<sup>662</sup> marido de María Moreno, viuda del Capitán Manuel Pellicer (JR, 1987, ítem 4032). Socio de Manuel del Arco.

<sup>663</sup> Hermano de Julián de Arriaga y del gran comerciante monopolista de Cádiz Pedro Arriaga, el mismo que

---

fuera en la década del 50 Corregidor y Justicia Mayor de Azángaro, y más luego fuera Teniente Gobernador Interino de Córdoba.

<sup>664</sup> Capitán y Regidor, marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa Avellaneda; y cuñado del gran comerciante Roque San Martín (FB, II, 273; y VI, 40; y JR, 1987, ítem 2632).

<sup>665</sup> socio de Juan Bautista de la Sala o Lasala.

<sup>666</sup> Barba, 1980, 59.

<sup>667</sup> natural de Cádiz; hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega; y marido de Isabel Gil, hija del comerciante Nicolás Gil, asesinado por los indios en la travesía del sur de Córdoba, y de Bartola Rodríguez Osorio (FB, I, 98; y JR, 1989, ítem 5161).

<sup>668</sup> Marido de Sabina Sorarte, viuda de Adrián Pedro Warnes; hija de Diego de Sorarte y de Juana Báez de Alpoin; con cuñado del Tesorero Oficial Real General Alonso de Arce y Arcos; y padre del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (FB, I, 140; y V, 199; y JR, 1987, ítems 3147 y 3305).

<sup>669</sup> Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan de Eguía y de Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

<sup>670</sup> natural de Pelmá, Obispado de Coimbra, Portugal; marido de María Antonia Malaver, natural de Buenos Aires, hija de Andrés Valentín Pacheco Malaver y de Petrona Peralta y Muga; con cuñado de José Gómez de los Santos (natural de Lisboa), Agustín Gerardo Marín, Nicolás de Arribí, y Matías Nicolás de la Fuente Samaniego (FB, III, 95 y 219; IV, 240; V, 105; y VI, 74; y JR, 1987, ítem 3001).

<sup>671</sup> probablemente primo del comerciante Blas Antonio Benito Ximénez Braga.

<sup>672</sup> Lamentablemente no me ha sido posible aún volcar en cada asiento el nombre del asegurador de cada operación.

<sup>673</sup> Según el Apéndice A-VI este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

<sup>674</sup> Borchart de Moreno, 1984, 92; y Kicza, 1986, 111.

<sup>675</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián (1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo (Moreno Cebrián, 1976, 228).

<sup>676</sup> Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que recién en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo

---

acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaren. Para más detalles ver el Apéndice D-I.

<sup>677</sup> No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta.

<sup>678</sup> Saguier (1992).

<sup>679</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 47.

<sup>680</sup> El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

<sup>681</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>682</sup> Assadourian, 1983, 127.

<sup>683</sup> casado con Agustina Tirado, hija de Juan Tirado y de María de Castro, y padre del comerciante Francisco de Carvajal y Tirado (FB, II, 75).

<sup>684</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-8, Exp. 9, fs. 10.

<sup>685</sup> Idem.

<sup>686</sup> para el comercio interno del Alto Perú y sus comerciantes de géneros de la tierra, ver Saguier (1993d).

<sup>687</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>688</sup> En efecto, cruzando la Lista A-III, de los matriculados en la Diputación de La Paz, con el Apéndice B-I sólo Francisco Guimará y Puyol y Manuel Inocencio Villegas otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs. 181, cit. por Tjarks, 1962, 193).

<sup>689</sup> En efecto, cruzando la Lista A-IV, de los matriculados en la Diputación de La Plata, con el Apéndice B-I, sólo Sebastián Antonio de Arana y Manuel de Entrambasaguas otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs. 181, cit. por Tjarks, 1962, 193).

<sup>690</sup> Casado con Manuela de Urrejola, hija de Estéban de Urrejola y de Josefá Peñaloza, y nieta del Teniente Gobernador de Santiago del Estero General Gerónimo de Peñaloza y de Isabel Alfaro. Concuñado de José Antonio Gorostiaga (Figuerola, 1927, 32).

<sup>691</sup> Bautizado en mayo de 1663, hijo del Capitan Juan Miguel de Arpide, natural de Guipúzcoa, y de Estefanía de Borda y Videla, cuñado del Capitán Antonio Meléndez de Figueroa, del Capitán José de Valdivia y Alderete, y del Sargento Alonso Suárez (Fernández de Burzaco, 1986, I, 161; y Pico, 1987, ítem 128).

<sup>692</sup> Tjarks, 1962, 87.

<sup>693</sup> La Lista A-II demuestra, fundado en numerosos Apéndices, como en Jujuy, a Manuel de la Quintana, Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1800 el concuñado de su cuñado, José de Alvarado y del Ribero. En Tucumán, a José Velarde, designado Diputado en 1800, le sucedió en 1808 su pariente político Domingo Villafañe, y a este último su cuñado Cayetano Rodríguez. En Santiago del Estero, a Manuel de Palacios, designado Diputado en 1796, le sucedió en 1805, su cuñado José Domingo Iramain. En Catamarca, a Francisco de Acuña, designado Diputado en 1803, le sucedió en 1805 su yerno Gregorio Ruza, y en 1806 su pariente político Feliciano de la Mota Botello. En Córdoba, a Ambrosio Funes, designado Diputado en 1794,

le sucedió en 1797 su cuñado Pedro Lucas de Allende, y en 1798 su pariente político Agustín Igarzábal. En Mendoza, a Bernardo Ortiz, Diputado en 1803, le sucedió su conculado Francisco Segura; y a Manuel Silvestre Videla, Diputado en 1804, le sucedió su cuñado Reymundo Pelliza Morales. En San Juan, de la decena de candidatos presentada en 1808 y 1810 por los Presidentes de la Diputación Tadeo Cano de Carvajal y Mateo Cano y Ramírez, uno es pariente carnal: Juan José Cano; y otro es un pariente político: Isidro Zavalla, por estar casado con Justa Cano de Carvajal. Los candidatos a Diputados Sanjuaninos del Consulado de Buenos Aires fueron en 1808: Juan José Cano; José de Contreras; Mateo Antonio Domínguez; Pedro Ignacio Flores; Hilarión Furque; Martín Gómez; Dionisio Navarro; Mariano Sanmillán; Juan Antonio Uriburu e Isidro Zavalla (Videla, 1962, 727). En Santa Fé, a Juan Francisco de Larrechea, designado Diputado entre 1796 y 1798, le sucedió en 1800 su conculado Manuel Ignacio Díez de Andino; a Quirce Pujato, designado Diputado en 1802, le sucedió en 1804 su sobrino político José Arias Troncoso, y a este último le sucedió en 1808 su pariente político Francisco Alzogaray. En Corrientes, a Manuel de Bedoya y Cossio, Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1796 su conculado Juan García de Cossio, en 1800 su otro conculado Isidro Martínez y Cires, y en 1802 su pariente Manuel Gómez Cossio (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7). Y en 1806 de la decena de candidatos a Diputados presentados por la Diputación Correntina se encontraban nuevamente los mismos conculados: Juan García de Cosio, e Isidoro Martínez Cires. En 1806 se presentaron como candidatos a Diputados: Juan García de Cosio, Isidoro Martínez Cires, Manuel Gómez de Cosio, Miguel de Ferragut, Antonio Queto, Francisco Alvarez Valdés, Angel Vedoya, José Luis de Madariaga, Fernando de la Torre y Domingo Real de Asúa (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, fs.230, Sala IX, 4-6-4). Y en Montevideo, a diferencia de las demás provincias y ciudades del Virreinato, no se registraron parentescos en su elite Consular, debido a la formación más reciente de su población.

<sup>694</sup> Entre 1798 y 1801, el Cónsul y luego Conciliario Manuel de Arana y Torrezuri habría influido para que se eligiera como Diputados en Salta, Córdoba y Jujuy a quienes fueran en 1787 y 1784 sus consignatarios Lino de Rosales y Francisco Antonio Bulnes, y a José de Alvarado, yerno de quien también fuera su consignatario en 1784 Manuel Sánchez de Bustamante, respectivamente (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1787, fojas 234v.; Reg. 1, 1785, fs.102; R.1, 1787, fs.66; y R.1, 1784, fs.375). Entre 1798 y 1802, el Conciliario Tomás de Balansátegui habría influido para que se eligiera como Diputados en Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes y Villa Real de Concepción, a quienes fueran entre 1792 y 1800 sus consignatarios Raymundo Pelliza, Pedro Carol, Angel Manuel Fernández Blanco y Francisco Quevedo, respectivamente (AGN, Protocolos, R.1, 1797, fs.424; R.1, 1792, fs.2; y R.1, 1797, fs.639; R.1, 1795, 545v.; R.1, 1799, fs.484v.; y R.1, 1800, fs.85). En 1796, el que luego fuera Consiliario Francisco Castañón habría influido para que se eligiera como Diputado en Cochabamba a Juan Carrillo de Albornóz (AGN, Protocolos, R.6, 1790, fs.116). En 1796, el Síndico Vicente Antonio Murrieta habría influido para que se eligiera como Diputado en Salta a quien fuera en 1796 su consignatario Pedro de Ugarteche (AGN, Protocolos, R.6, 1796, fs.107). En 1797, el Consiliario Pedro Duval habría influido para que se eligiera como Diputado en Santa Fé a Juan Francisco de Larrechea, conculado de quien fuera en 1795 su propio consignatario José Teodoro Larramendi (AGN, Protocolos, R.2, 1795, fs.351). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Román Ramón Díaz habría influido para que se eligiera como Diputado en Tucumán a quien fuera su consignatario José Ignacio Garmendia (AGN, Protocolos, R.1, 1793, fs.512v.). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Martín de Alzaga habría influido para que se eligiera como Diputados en Jujuy y Santa Fé a quienes fueran en 1793 sus consignatarios Martín de Otero y Agustín de Iriondo (AGN, Protocolos, R.6, 1793, fs.78; R.4, 1788, fs.21v.; R.1, 1790, fs.67; y R.6, 1791, fs.77v.). En 1802, el Consiliario Cecilio Sánchez de Velasco habría influido para que se eligiera como Diputado en Catamarca a quien fuera en 1786 su consignatario Francisco de Acuña (AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs.75). Entre 1802 y 1805, el Consiliario Anselmo Sáenz Valiente habría influido para que se eligiese como Diputados en La Plata, Mendoza y Cochabamba, a quienes fueran en 1802 sus propios consignatarios o parientes de los mismos: Manuel de Entrambasaguas, Manuel Silvestre Videla (medio hermano de Juan Agustín Videla) y Mariano Antezana, respectivamente (AGN, Protocolos, R.6, 1802, fs.404; R.6, 1802, fs.553v.; R.6, 1802, fs.254; y R.6, 1804, fs.56v.). Y en 1806, el Consiliario José Martínez de Hoz habría influido para que se eligiera como Diputado en Salta a quien fuera en 1791 su propio consignatario Mateo Gómez Zorrilla (AGN, Protocolos, Registro 1, 1785, fs.416v.; y Registro 5, 1791, fs.74v.).

<sup>695</sup> Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz, reclamó contra las propuestas que entonces se hicieron de Juan Viola, para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcano, para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora

---

Azcuénaga], que sólo era entonces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena" (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con [Josefa de Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina, "...no Teniente de Conciliario sino Consiliario actual como Cónsul saliente", el Oidor Juez de Alzadas dió lugar al planteo (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

<sup>696</sup> ver Saguier, 1993a.

<sup>697</sup> En el Alto Perú, a Francisco Cueto le siguió su yerno Ignacio Gorrity. A Diego Barrón y Hontañón, le siguió su yerno Domingo Antonio de Achával. A Sebastián José de Ocampo y Guerra le siguió su hijo Manuel José de Ocampo y Navia. A Francisco Rodríguez de Vida, le siguieron sus yernos José de Astuena y Manuel Alfonso de Sanginés. A José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. Y a Xavier Saturnino de Saraza le siguió su yerno Francisco Casimiro de Necochea (notas del Apéndice C-I)..

<sup>698</sup> vino en los registros de Francisco de Alzaybar, fué designado Corregidor de Omasuyos, y concertó entre 1731 y 1742, con Francisco de Alzaybar, Pedro de Aoíz, Tomás Hilson, y Miguel G. Ruiz, cuatro operaciones de crédito por valor de \$3.441 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1731, fs. 234; Reg. 3, 1738, fs. 589; Reg. 3, 1742, fs. 5; y Reg. 1, 1742, fs. 353).

<sup>699</sup> pariente del gran comerciante de Cádiz Don Juan Agustín de Ustáriz. Probablemente fuere el padre de Ramón Urtizberea, quien en 1789 formalizó con su hermano una compañía con Juan Gelly, para la explotación de un mineral en Aullagas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442, fs. 194). Esta compañía terminó cuando Gelly --cuyo ingenio fué embargado, luego de haber sido suspendido por no dar la ley de los metales-- vació del azogue a la misma, contraviniendo las leyes que prohibían su comercio (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442).

<sup>700</sup> Francisco de las Heras a Nicolás de la Quintana, 20-I-1755 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>701</sup> *Ibidem*.

<sup>702</sup> casó en 1751 con Sabina Gallegos, hija del gran comerciante Antonio Gallegos, nacido en la Villa de Santadilla, Obispado de Burgos, y de Sabina de Rámila (Fernández de Burzaco, III, 115; y V, 427).

<sup>703</sup> Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de Santiago de Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:

- a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;
- y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, y en segundas nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoíz (Fernández Burzaco, II, 285 y 286)

<sup>704</sup> Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y de Antonia Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (Fernández de Burzaco, I, 326); y tío carnal de José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y Pinto, la hija del Maestre de Campo Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

<sup>705</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14.

<sup>706</sup> Para el Canadá, Miquelon (1978) relata como los importadores franceses estaban en la gestión de sus cobros a merced de la buena o mala voluntad de los funcionarios criollos (Miquelon, 1978, 104).

<sup>707</sup> Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2). El parentesco que José de Asacasubi pudo haber tenido con Marcos Ascasubi, suegro del General José de Allende y Losa, avecindado en Córdoba, aún no lo he podido detectar.

<sup>708</sup> hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel

---

Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y con cuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5161).

<sup>709</sup> Este pleito, que litigaba Rafael de los Reyes y Serrano en Lima, era por 200 almadanetas, valuadas en la suma de \$38.000, procedente de dos escrituras que Ascasubi otorgara en Buenos Aires en 1752 a favor de Alvarez Campana (AGN, Sala IX, Protocolos, Reg. 4, 1752, fs.126v. y 337). Habiendo Reyes reconvenido a Ascasubi por la deuda, en 1759, año en que llegó a Potosí, éste se limitó a escribir a Campana que él no debía dicha suma y que las almadanetas las había entregado al difunto Coronel Miguel Antonio Ezcurrechea, cuñado de Pedro Francisco Iribarren, ex-dueños de un Banco de Plata, competidor del de Joaquín Herboso e Isidro J. Navarro, que el Corregidor y Visitador General Ventura de Santelices y Venero no tuvo más remedio que cerrar. Ezcurrechea había sido Alcalde de la Santa Hermandad en 1729, Alcalde Ordinario en 1733, Situadista en 1735, auxiliar del Corregidor Santelices en sus proyectos de reforma, y había concertado en 1750 conjuntamente con Nicolás del Valle en Cádiz, con destino a Buenos Aires, 23 operaciones por valor de \$575.460 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 9). También concertó en Buenos Aires con destino a Salta entre 1732 y 1752 doce operaciones por valor de \$110.819, entre las que descuellan las tres operaciones que contrajo con Francisco Alvarez Campana en 1752 por valor de \$21.000 más el valor correspondiente a cien almadanetas, para luego pasar a ser propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, falleciendo en 1756 y dejando por única heredera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo, tercer Marqués de Santa María de Otavi (AGN, Protocolos, Reg.3, 1732, fs.309; Reg.3, 1735, fs.366; Reg.1, 1741, fs. 280v.; Reg.3, 1741, fs.558; Reg.3, 1742, fs.466 y 378v.; Reg.4, 1752, fs.152v. y 126v.; Reg.2, 1752, fs.335v. y 337).

<sup>710</sup> Lamentablemente Burkholder y Chandler (1984) no nos brindan información acerca de Visitadores y Jueces Comisionarios. En cuanto al lugar de nacimiento de los Oidores, de 25 Oidores de la Audiencia de Charcas enumerados entre 1741 y 1800, 7 eran originarios de Lima y uno sólo de Buenos Aires (Burkholder y Chandler, 1984, Apéndice X, 318-320).

<sup>711</sup> marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y con cuñado de Diego Tejedor y Solórzano (FB, II, 149; y VI, 343; y JR, 1987, ítem 3289).

<sup>712</sup> Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; con cuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

<sup>713</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>714</sup> Idem.

<sup>715</sup> AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

<sup>716</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

<sup>717</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de \$198.211 de manos de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos, Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795, fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466; y R.6, 1802, fs.495).

<sup>718</sup> Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

---

<sup>719</sup> Actas, Consulado, III, 105-113; y Bermúdez Miral, 1962.

<sup>720</sup> Tjarks, 1962, 88.

<sup>721</sup> Yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144); y probable primo hermano del Capitán Diego de Alvear y Ponce de León. Contrajo deudas en 1772 y 1777 con Xavier Saturnino Saraza, Agustín Casimiro de Aguirre, y Pablo Thompson (AGN, Protocolos, Reg.3, año 1772, fs.206v.; Reg.5, 1772, fs.183v.; y Reg. 5, 1777, fs.281v.).

<sup>722</sup> Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.10).

<sup>723</sup> representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107).

<sup>724</sup> Cajías de la Vega, 1983, 413; y 1986, 73-74.

<sup>725</sup> Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

<sup>726</sup> Procurador General en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). El Comisionado del Virrey de Lima José Álvarez Nava le siguió una causa criminal por malversación de los fondos pertenecientes a la Renta de Correos de Oruro. Aurrecoechea le había adelantado al Alférez Real Diego Antonio Flores (marido de María Josefa Galleguillos), en 1777, \$72.000, procedentes de las rentas del Correo, para el trabajo de sus minas e ingenios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.3, Exp.9a; y Hacienda, Leg.10, Exp.192).

<sup>727</sup> Procurador General en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Sobre su defensa, excarcelación y conducción a España (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.4, Exp.13; e Interior, Leg.39, Exp.14). Sobre su embargo (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.29, Exp.750). Sobre su testamentaria (AGN, División Colonia, Juzgado de Bienes de Difuntos, Leg.40, Exp.12).

<sup>728</sup> Alcalde de segundo voto en 1781 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Urquieta, mujer del Regidor Decano Manuel Serrano, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8); y de Manuela Gallardo y Urquieta, mujer de Joaquín Mariano de León y de José Antonio Ramallo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.2).

<sup>729</sup> Alcalde de segundo voto en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Se encuentra en una lista de declarantes complicados en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.1). En 1784 se le embargan sus bienes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.23). En 1807 sus herederos presentan quejas contra el Comisionado de Visita de Oruro (AGN, División Colonia, Interior, Leg.62, Exp.8).

<sup>730</sup> Alcalde de segundo voto en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Galleguillos, mujer de Diego Antonio Flores, uno de los reos de Oruro, y heredera de José de Galleguillos, dueño de los Ingenios de Sora Sora (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.6; y Hacienda, Leg.61, Exp.1559).

<sup>731</sup> Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>732</sup> Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>733</sup> Cornblit, 1972, 137.

---

<sup>734</sup> Lewin, 1957, 564-565. Debe destacarse que en Buenos Aires fueron defendidos por el abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1).

<sup>735</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>736</sup> La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

<sup>737</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>738</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VII, de los matriculados en la Diputación de Tucumán, con el Apéndice B-V, Bernabé Aráoz, Manuel Reborado, Cayetano Rodríguez, Antonio Terri, Francisco Monteagudo, y Manuel y José Pose otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, fs. 76 y 80, Sala IX, 4-6-4, citado por Tjarks, 1962, 196).

<sup>739</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>740</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VI, de los matriculados en la Diputación de Salta, con el Apéndice B-IV, los comerciantes Antonio Aguela, Juan Francisco Alvarado, Pedro Binueza, Domingo Cardo, Manuel Cordero, Fructuoso Figueroa, Ermenegildo Hoyos, Santiago Maceira, Antonio Martínez de San Miguel, Leandro Ravago, José Ramírez Herrero y Santiago Urien Valle, que constituían el 30% de los comerciantes, no alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, fs.86-87, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>741</sup> En efecto, cruzando la Lista A-V, de los matriculados en la Diputación de Jujuy, con el Apéndice B-III, los comerciantes José Aguiriano, José Antonio Malluquiza, Félix Echeverría, Andrés Mangudo, Vicente José Mota, Manuel de la Quintana, Andrés Ramos, Diego Rodríguez y Gregorio Antonio Zegada, que constituían casi el 50% de los comerciantes, alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VIII, Sala IX, 4-6-8, fs.56, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>742</sup> En efecto, Juan José de Erquicia, Nicolás de Villacorta, y Bartolomé Francisco de Maguna, se adueñaron del Cabildo. Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario, y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia "...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774 expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de justicia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41). En los Cabildos de las Capitales, esta práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o enfermando los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a. en otro" (Ibídem). La acumulación de varas fué tan comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva Elección" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12). Tan aguda fué esta concentración de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo de Rueda, el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos,

---

pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades" (Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349).

<sup>743</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>744</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VIII, de los matriculados en la Diputación de Santiago del Estero, con el Apéndice B-VI, los comerciantes Alonso Araujo, Eusebio Arrieta, Pablo Basso, Francisco y Antonio Neprote, Lorenzo Unzaga y Marcos Ybarra no habían otorgado escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, fs.214, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>745</sup> En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco Antonio Gonsález de San Millán, quien había contraído nupcias con la hija de un patricio, nieto de encomenderos, y era socio y amigo del Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui, el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila, impugnó las elecciones, so pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y Toledo Pimentel] y un conculado [Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38). Asimismo, los parentescos de su mujer agravaban el nepotismo. En efecto, la mujer de San Millán, María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel, era sobrina carnal de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Avila; y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era conculado de San Millán y del comerciante Pedro José de Ibazeta, por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa y Toledo Pimentel.

<sup>746</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>747</sup> En efecto, cruzando la Lista A-IX, de los matriculados en la Diputación de Catamarca, con el Apéndice B-VII, sólo los comerciantes Bernardino Aumada, Juan Manuel Correa, Saturnino Maubezín, Francisco Romay, Fernando Soria, José Luis Segura, Antonio Viso, Joaquín Espinosa, Andrés de Herrera, y Juan y Ramón García, que constituían el 40% de los comerciantes Catamarqueños, no habían otorgado escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, citado en Tjarks, 1962, fs.135-135v.).

<sup>748</sup> En Jujuy, a Manuel Sánchez de Bustamante le sucedieron sus yernos José de Alvarado, Félix de Echeverría y Manuel de Tezanos Pintos. En Salta, a Sinforoso Rioja le sucedió su yerno José Domingo García Torres. Y a José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. En Tucumán, a Fermín Vicente de Texerina y Barreda, le sucedieron sus yernos Manuel Posse y Manuel Fernández Carranza (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379). A Juan García Cárdenas, le sucedió su yerno Miguel Pérez Padilla. A Adrián Aramburu Zavala, le siguió su hijo Ramón. A Martín León García, le sucedió su yerno Miguel Viaña. Al Coronel Gregorio Antonio de Zegada y Velloso, le sucedió su yerno Diego José de Pueyrredón. A Juan José de las Muñecas, le siguió su hijo o nieto Juan Manuel Muñecas, registrado como empleado en las milicias. Y en Santiago del Estero, a Pedro Bautista Lami, le siguió su yerno Pedro Antonio de Zavalía. A Gregorio Beltrán le sucedió su hijo o hermano Mariano Beltrán. Y a Francisco Ybarra le sucedió su hijo o nieto Marcos Ybarra (Notas de los Apéndices C-II al C-IV).

<sup>749</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>750</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>751</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

---

<sup>752</sup> Hijo del Coronel Gregorio de Zegada, antiguo Situadista, y de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; marido de Ana María del Carmen Gorriti; hermano del R.P. José Miguel de Zegada; y padre del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

<sup>753</sup> Cabos de partidas que obraban separadamente del ejército con determinado número de soldados que él mismo juntaba o elegía.

<sup>754</sup> Llamábase así al soldado pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiese ofrecer al oficial que manda y para las ordenes y avisos.

<sup>755</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

<sup>756</sup> *Ibidem*. En un resumen de pagos mensuales de los Regimientos de Dragones de Chulumani, pagados por el Corregidor José de Albizuri, un Capitán ganaba \$70, un teniente \$60, un subteniente \$50, los sargentos \$30, los tambores \$25, los cabos primero \$28, los cabos segundos \$25, y los soldados \$15 y 4 reales (Valle de Salinas, 1990, 420).

<sup>757</sup> Hasta el momento en Salta hemos podido detectar sólo a Francisco Antonio González de San Millán (AGN, Sala IX, Interior, Leg.43, Exp.6). Fueron proveedores de las Tropas Veteranas destinadas a pacificar las provincias del Perú Antonio Sáenz de Texada, Ramón Ballivián, José Antonio Sanjurjo, y Martín José de Ochoteco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.7, Exp.18).

<sup>758</sup> Villalobos, 1968, 1990, 204.

<sup>759</sup> Villalobos, 1990, 105.

<sup>760</sup> Villalobos, 1968, 1990, 206.

<sup>761</sup> Hijo de Fermín de Vicuña y de María de Berroeta, bautizado en Aranaz en febrero de 1689, Regidor de Santiago en 1721, Alcalde en 1733, y Corregidor de Melipilla en 1739, casado en julio de 1719 con Josefa Hidalgo, hija de Gaspar Hidalgo y de Nicolasa Zavala, y ambos padres de Tomás Vicuña, casado con Carmen Madariaga, dueños de la estancia Putaendo; de Francisco Vicuña, Alcalde de Santiago en 1776, casado con María del Carmen Larraín, hija de Martín José de Larraín; de María Petronila Vicuña, casada con Joaquín de Guerola e Ibáñez, Oficial Real de Chucuito; y de María Josefa Vicuña, casada con Pascual de León (Espejo, 1967, 848).

<sup>762</sup> A Martín José de Larraín le siguió su yerno Joaquín Trucios. Y a Matías Felipe de Idoate le siguió también su yerno Manuel Rodríguez Zorrilla (Espejo, 1967, 703).

<sup>763</sup> para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos, 2.301 criados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas (información publicada por Caillet-Bois, 1930).

<sup>764</sup> Con referencia a las tres ciudades de Cuyo, Sierra (1960) les asigna en 1777 -sobre la base de un documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello- una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%; 4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388 mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%; 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de los cuales 1908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1800 eran blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

<sup>765</sup> Villalobos, 1990, 105.

<sup>766</sup> Comadrán Ruiz, 1984, 434.

<sup>767</sup> Videla, 1962, 727.

---

<sup>768</sup> En Mendoza, al comerciante Nicolás Gil, asesinado por un malón indígena al sur de Córdoba, le sucedió su yerno Pascual Mariano Basallo; a José Sebastián Sotomayor le suceden sus yernos Félix Correas, Domingo Corvalán, José Clemente Benegas, Isidoro Sáinz de la Maza, y Francisco Xavier de Molina; a Francisco Videla y Aguiar le suceden su hijo Juan Agustín Videla y Aguiar, y su yerno Raymundo Pelliza Morales; a Fernando Jurado su yerno Francisco Vargas; a Francisco Borja Corvalán su yerno Cruz Vargas; y a Fernando Güiralde le sucedió su yerno Rafael Bargas. Y en San Juan, a Tomás Miguel Blanco Jofré le sucedió su yerno Pedro Fernández Maradona; a Vicente Sánchez de Loria Jofré le sucedió su hijo Vicente Sánchez Jofré y su yerno Nicolás Riberos Sarmiento; al Maestre de Campo Juan Luis de Funes y Ruiz de la Cuesta le sucedió su yerno Alonso Isidoro Rodríguez Peña; a Fernando Torres le sucedió su hijo José Matías de Torres y Funes; a Francisco Xavier Garramuño le sucede su hijo José Xavier Garramuño; a Francisco Alfonso Pereira le sucede su conuñado Remigio Albarracín; a Juan de Dios Furque le sucede su hijo Hilarión Furque; a Francisco Flores su hijo o sobrino Pedro Ignacio Flores; y a Fernando Tadeo de la Rosa le suceden sus yernos Pedro Carril, José Godoy Oro y Domingo Vásquez Carril (Notas de los Apéndices C-VI al C-VIII).

<sup>769</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5.

<sup>770</sup> Hijo del Administrador de la Renta de Tabaco de Tucumán Coronel Manuel Estéban de Castro y de Dominga Carreño Bazán, hija a su vez del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera. Era sobrino de Francisca Carreño Bazán, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68), y yerno del comerciante Juan de Lahoraia (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366). Era también pariente político por vía de su mujer con el Comandante de Armas José Xavier Jofré (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 115, Exp. 19, fs. 197).

<sup>771</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.136, Exp.3427, fs.33.

<sup>772</sup> León Solís, 1989-90, 181.

<sup>773</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>774</sup> Punta, 1992, 14 y 19.

<sup>775</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>776</sup> En efecto, cruzando la Lista A-X, de los matriculados en la Diputación de Córdoba, con el Apéndice B-IX, los comerciantes Pedro Altamira, Luis y José Escobar, Juan Francisco y Juan Bautista Echevarría, Juan Fernández Abregu, Julián Freytes, Francisco Ynocente Gache, Bernardo y Francisco Maceda, Florencio García, Justo Mendoza, Juan Paz, Mariano Rodríguez, Francisco Solar y Francisco Vaz no habían otorgado nunca escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, Consulado de Buenos Aires, Libro VI, 4-6-6, fs. 101, 117 y 121, citado en Tjarks, 1962, 193).

<sup>777</sup> Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes. Adquirió de las Temporalidades la que fuera la hacienda Jesuítica de Santa Catalina. Mantuvo en vida un largo litigio con un esclavo de su propiedad (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.16). En 1792 solicitó que se lo releve a su hijo Jose Javier Díaz (Alcalde de Segundo Voto) de ejercer el empleo de Alcalde de Primer Voto (AGN, Tribunales, Leg.91, Exp.3).

<sup>778</sup> Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). En 1780 solicita del Censor Eclesiástico la aprobación de sus conclusiones Escolásticas en latín (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.23, Exp.654). Bautizado en Velbis de la Jara, Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de Catalina García de las Heras, y casado con María Eugenia Arias de Cabrera, hija del Cap. Juan Luis Arias de

---

Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo. Era concuñado del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente (Espejo, 1967, 444). Bernabé Gregorio de las Heras era hermano de María Gregorio de las Heras (mujer de Juan de Tejerina, y madre de Gregorio Tejerina y Gregorio de las Heras, marido de Josefa de Usandivaras y Allende); y de Bernardo Gregorio de las Heras, bautizado en Velbis en agosto de 1749, Alférez Real de Buenos Aires en 1773, Regidor, Defensor de Menores, Tesorero en 1783, casado con María Rosalía Ursula de la Gacha, hija de Juan Ignacio de la Gacha, nacido en la Villa de Guetaria, Guipúzcoa, y de Juana María de Rojas y Acevedo. Don Bernardo era el padre del prócer de la independencia de Chile General Juan Gualberto Gregorio de las Heras (LC, II, 15 y 20; FB, 1988, III, 99).

<sup>779</sup> Las Heras llevaba contraídas entre 1766 y 1804 una treintena de transacciones crediticias con Juan Tomás Echever, Domingo Belgrano Pérez, Pablo Ruiz de Gaona, Domingo de Basabilbaso, Manuel del Arco, Phelipe Santiago del Pozo, Diego Casero, José de San Pedro Lorente, Pedro Manuel Beruti, Ventura LLorente Romero, Manuel Antonio Barquin, Gaspar de Santa Coloma, Tomás de Valansátegui, Juan José Lezica, Casimiro Francisco de Necochea, Cristóbal Avecilla, Martín de Alzaga, y Diego de Agüero, por la suma total de \$163.969 (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.35v.; R.6, 1766, fs.47; R.2, 1767, fs.248, 222, y 256v.; R.3, 1767, fs.254v.; R.5, 1767, fs.294; R.2, 1768, fs.222v.; R.6, 1768, fs.273, y 275; R.3, 1774, fs.520v.y 466v.; R.5, 1774, fs.201; R.6, 1774, fs.339; R.3, 1776, fs.305v.; R.5, 1778, fs.47; R.1, 1782, fs.337; R.6, 1782, fs.186; R.1, 1783, fs.321; R.4, 1783, fs.353v.; R.6, 1784, fs.259; R.4, 1786, fs.259 y 263v.; R.6, 1786, fs.35 y 45v.; y R.3, 1804, fs.192).

<sup>780</sup> A Domingo de Castro, le siguió su yerno Melchor Otero. A Claudio Durán Espinosa, le siguió su yerno Andrés Paz de Codecido. A Juan Francisco Alberro, le sucedió su yerno Juan Antonio de Saráchaga, y a este último su propio yerno Bernardo Básquez Maceda. A Antonio del Castillo, le siguió su yerno Lorenzo Recalde y Cano. A Juan Bautista de Isasi le sucedieron sus yernos Estéban Montenegro y Miguel de Learte y Ladrón de Zegama. A Bruno Martínez le sucedió su yerno Benito Rueda. A Miguel del Corro su yerno Antonio Benito Fragueiro. A Lorenzo Cavallero, le siguió su yerno José de Isasa y Ponce de León. Y a Francisco Antonio Díaz, su yerno José García Piedra (ver Lazcano Colodrero y notas del Apéndice C-V).

<sup>781</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>782</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>783</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>784</sup> Falcao Espalter, 1926, 39, citado por Tjarks, 1962, 194.

<sup>785</sup> Tjarks, 1962, 803, nota 4.

<sup>786</sup> En Santa Fé, a Lázaro Umeres y Basauri, le siguió su yerno Gabriel de Quiroga, y a este su yerno Salvador Ignacio Amenábar. A Francisco Piedrabuena, le sucedió su yerno el Regidor Decano Juan Francisco Roldán. Y a Antonio Candiotti y Muxica, le sucedieron su hijo Francisco Antonio Candiotti y su yerno Juan Francisco Aldao (Ver Crespo Naón, 1983 y notas del Apéndice C-X).

<sup>787</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>788</sup> hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguari y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207).

<sup>789</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>790</sup> BRAH, Colección Mata Linares, t.56, cit. en Carbonell, 1992, 295.

<sup>791</sup> Nacido en Puerto Real, Andalucía, hijo de Juan David y de Juana Josefa de Pereio, y marido de María Sabina Villagra Morales (FB, II, 207). Es posible que fuera pariente del comerciante José David, fuerte comerciante que giraba en el comercio entre Manila y México (Borchart de Moreno, 1984, 69, 71 y 89).

<sup>792</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, fs. 36.

---

<sup>793</sup> nacido en Montevideo, hijo de José de Collantes y de Petrona Cevallos, marido de Juana Illanes (Fernández de Burzaco, II, 143).

<sup>794</sup> hijo de Carlos Wright y de María Martina Prans (FB, VI, 298).

<sup>795</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1939, fs. 12.

<sup>796</sup> *Ibidem*.

<sup>797</sup> *Ibidem*.

<sup>798</sup> Maeder, 1981, 105.

<sup>799</sup> En efecto, cruzando la Lista A-XV, de los matriculados en la Diputación de Corrientes, con el Apéndice B-XX, los comerciantes Pedro Antonio Almeyda; Francisco Javier Barberán; José Ignacio Beláustegui; Antonio Bens; Agustín Casar; Angel M. Fernández Blanco; Agustín Jiménez; Isidoro Martínez y Cires; Raymundo Molinas; e Ignacio Velando, habían otorgado escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, 4-6-4, fs. 230, citado en Maeder, 1981, 318).

<sup>800</sup> Félix David a Pedro García Rodríguez, Asunción, 1788 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, fs.90.).

<sup>801</sup> *Idem*.

<sup>802</sup> Levene, 1952, 415. Levene fundaba sus conocimientos monetarios en la obra de Sáez (1805).

<sup>803</sup> ver Saguier, 1987, 111.

<sup>804</sup> Bernal, 1992, 317.

<sup>805</sup> Bernal, 1992, 78 y 80.

<sup>806</sup> Bakewell, 1976, 319.

<sup>807</sup> Sin embargo, asimilar las operaciones de crédito privado del Antiguo Régimen a nuestras "monedas escriturales" actuales era, para Vilar (1969), imposible, si no se le tomaba con cautela. En el caso del crédito de venta, mutuo, o fiado, pese a ser endosable, no era convertible en circulante, según Vilar, por padecer de fecha de vencimiento, circular en cifras desmedidas, y no ser divisible o fraccionable. Al igual que hoy las tarjetas de crédito no son implementadas en las investigaciones que refutan la teoría cuantitativa del dinero, tampoco podríamos considerar para este propósito al fiado y las libranzas. No obstante, para autores como Flynn (1980), el padecer de fecha de vencimiento no le impedía al dinero escriturario convertirse en un circulante transitorio, que por la ley de Gresham desplazaba de la circulación doméstica en el mercado mayorista a la moneda metálica.

<sup>808</sup> ver Comadrán Ruiz, 1969; y Tandeter, 1992.

<sup>809</sup> Goldstone, 1984, 1141.

<sup>810</sup> Ouweneel y Bijleveld, 1989, 500.

<sup>811</sup> Eklund, 1980, 383; y Tortella Casares, 1986.

---

<sup>812</sup> Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

<sup>813</sup> Assadourian, 1970, 72 y 75.

<sup>814</sup> Aglietta, 1990, 225.

<sup>815</sup> Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el Imperio Otomano, ver Genç, 1987. El énfasis que Tandeter (1993) otorga a los estudios fundados en fuentes fiscales, entre las investigaciones interrumpidas por las dictaduras militares (Tandeter, 1993, 805), va en desmedro de aquellas investigaciones centradas en las fuentes notariales y judiciales, que también se vieron frustradas por dichas dictaduras y por la desidia con que fueron y son tratados los Archivos históricos.

<sup>816</sup> Sée, 1927, 295.

<sup>817</sup> Saguier, 1991, 107.

<sup>818</sup> Bernal (1992) registra una serie numerosa de quebrantos a partir de 1765 (Bernal, 1992, 467-468).

<sup>819</sup> Dilg, 1975, 263.

<sup>820</sup> Vásquez de Prada, 1968, 207.

<sup>821</sup> Bernal, 1992, 478.

<sup>822</sup> Puiggrós, 1940, 179.

<sup>823</sup> Acerca del desequilibrio de la balanza comercial Chilena, ver Villalobos, 1968, 1990, 190.

<sup>824</sup> Cooney, 1987, 163-164.

<sup>825</sup> También en México se difundieron las compañías de comercio, ver Torales Pacheco (1988).

<sup>826</sup> Diego de Agüero fleta \$138.905, Jaime Alsina \$51.527, Martín de Alzaga \$25.501, Juan Estéban de Anchorena \$20.840, Joaquín de Arana \$50.631, Tomás de Balanzategui \$90.671, Isidro J. Balbastro \$33.332, Francisco J. Díaz Vélez \$39.444, Juan Bautista Gainza \$105.739, Luis de Gardeazábal \$160.686, Bernardo Gregorio de las Heras \$27.584, Pablo Ruiz de Gaona \$122.416, Gaspar de Santa Coloma \$59.275, Martín de Sarratea \$48.241, Francisco Ignacio de Ugarte \$23.178, y Juan Ignacio Ezcurra, Anselmo Sáenz Valiente, Juan Antonio de Lezica y Casimiro Francisco de Necochea, las increíbles sumas de \$203.046, \$284.814, \$377.583 y \$331.000 respectivamente (Cuadro A-III del tomo I).

<sup>827</sup> Goebel, 1938, 309.

<sup>828</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>829</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

---

<sup>830</sup> de esta última cifra hay que deducir \$75.000 correspondientes al valor de una hacienda de cocales llamada Miraflores, existente en los Yungas, Alto Perú, que fuera vendida por Francisco Ramos Mexía y su esposa María Antonia Seguro. En Saguier, 1993, pág.10 y Tabla C-I se deslizan algunos errores que aquí quedan salvados.

<sup>831</sup> ver Pastore, 1990 y 1991.

<sup>832</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes, para circular de pago en pago, la cual perduró legalmente hasta Caseros.

<sup>833</sup> otorgadas por el Consejo de Gracia y Justicia del Consejo de Indias.

<sup>834</sup> ver Saguier, 1994c.

<sup>835</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

<sup>836</sup> Entre Levene (1927) y Muñoz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada en que el primero sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de una trayectoria secular, mientras el segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de un proceso" (Muñoz Pérez, 1947, 618; y Levene, 1952, 229). Debo la referencia de este debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

<sup>837</sup> Ingenieros, 1918; y Bagú, 1952.

<sup>838</sup> Para Guatemala, Langenberg (1989); para Lima, Galdames (1964) y Molestina (1992); para La Paz y Potosí, Escobari de Querejazu (1990); para Santiago de Chile, De Ramón (1974-75, 1978); para Buenos Aires, Melo (1959, 1963, y 1964); para Córdoba, Robinson (1979) y Luque Colombres (1980); para Corrientes, Maeder (1981); y para Salta, Martínez (1982) y Caretta de Gaufrin y Marchionni (1993).

<sup>839</sup> para Cochabamba: Gordillo y Jackson (1987) y Larson (1988); para Chile: Borde y Góngora (1956); para el Perú: Ramírez (1991); y para México: Taylor (1972), Brading (1973) y Van Young (1983).

<sup>840</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>841</sup> el tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). El retracto era el derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>842</sup> Cruz, 1990, 261. Para el caso de Boloña, ver Bocchi (1979); para Nápoles, ver Placanica (1983), Colletta (1985) y Derosas (1991); para la Lombardía, ver Zaninelli (1986); para Padua, Pavanello (1977); y para Venecia, Pavanello (1981). La Fundación Benetton está actualmente financiando una extensa investigación sobre la campaña Trevigiani, bajo la supervisión científica de Gaetano Cozzi y la dirección de Danilo Gasparini (Derosas, 1991, 728).

---

<sup>843</sup> Actualmente un equipo de tesis del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, bajo mi dirección, se halla restaurando el catastro histórico de la ciudad de Buenos Aires. El equipo está constituido por Silvia Magrino, Fabiana Pouso, Silvia Albornoz, Alejandra Mancuso, Lucía Ruiz, Claudia Devesa, Liliana Suárez y María Rivas.

<sup>844</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

<sup>845</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>846</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>847</sup> Jensen (1963), Blackmar (1980) y Salinger y Wetherell (1985) comprueban para los casos de Filadelfia y Nueva York fenómenos inflacionarios semejantes (Jensen, 1963, 126-127; Blackmar, 1980, 131-148; Salinger y Wetherell, 1985, 829; citados por Nash, 1987, 130).

<sup>848</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.R-15, Exp.7.

<sup>849</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.255, Exp.41, fs.11.

<sup>850</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.M-3, Exp.4.

<sup>851</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.Z-4, Exp.5.

<sup>852</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A-11, fs.20.

<sup>853</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>854</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

<sup>855</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

<sup>856</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>857</sup> hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (Archivo Histórico de

---

Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

<sup>858</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan Rodríguez (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del Centro de Historia Familiar]).

<sup>859</sup> hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

<sup>860</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

<sup>861</sup> Familia de origen santafesino.

<sup>862</sup> hija de Pedro del Casal Verón y Andrada y de Maria Gómez de Sanabria, viuda del Teniente de Rey Baltasar García Ros, y Abadesa del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba.

<sup>863</sup> hijo del Capitán Juan de los Ríos y Gutiérrez, burgalés, y de Ana Delgadillo y Atienza, natural de Santa Fé (Avellá-Cháfer, I, 153).

<sup>864</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

<sup>865</sup> Para su descendencia ver Alvarenga Caballero, 1978.

<sup>866</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8. Para la descendencia de Lázaro Umeres ver Crespo Naón, 1983 y 1984.

<sup>867</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

<sup>868</sup> AGN, Protocolos, Registro 1, 1773/74, fs.63v.

<sup>869</sup> nacido en Valencia, marido de Angela Pestaña, hija del Capitán Manuel Pestaña y de Josefa Gregoria Rodríguez; y padre de los dos Tenientes de Dragones muertos por los indios en la Costa Patagónica (FB, V, 202).

<sup>870</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.116, Exp.16, fs.1.

<sup>871</sup> hijo de Manuel de Pestaña, natural de Portugal, bautizado en 1734, y de Gregoria Rodríguez, natural de Santa Fé; hermano de Angela y María Ana Pestaña; marido de Josefa Rodríguez Cardoso; padre de 11 hijos y suegro de Policarpo Rodríguez Campomanes (Apolant, 1966, ítem 513).

<sup>872</sup> mujer del Capitán Manuel Pestaña (Apolant, 1966, ítem 513).

<sup>873</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.8, fs.4.

<sup>874</sup> hijo del Regidor Bernabé Denis y de Juana Paula de Giles y Cossio Terán (FB, II, 214; y A-Ch, I, 101).

<sup>875</sup> viudo de Ciriaca Aguilera, Don Miguel había contraído segundas nupcias, y engendrado nuevos hijos (AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro

---

s/capellanía"). Era tío materno carnal del autor de la letra del Himno Nacional Argentino Vicente López y Planes.

<sup>876</sup> hijo del Capitán Mateo de Cossio y Terán y de María Rodríguez de Figueroa, marido de María Rodríguez de Figueroa (A-Ch, I, 98).

<sup>877</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.D, N.2, "Denis, Pedro J. c/Planes, Miguel p/cobro de réditos de una capellanía situada en casa de Planes".

<sup>878</sup> hijo de Miguel Planes y Ciriaca Aguilera (A-Ch, I, 288; y FB, I, 46).

<sup>879</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía".

<sup>880</sup> Idem, fs.159v.

<sup>881</sup> Idem, fs.158.

<sup>882</sup> Idem. fs.159v.

<sup>883</sup> hijo del Teniente Coronel de Artillería Vicente Antonio Reyna Vázquez y de María Josefa Teresa de Cáceres (FB, VI, 345).

<sup>884</sup> Acuerdos, IV Serie, t. IV, 503; y t. V, p.68.

<sup>885</sup> Matías de Abaroa y Barrena, José de Arroyo, Vicente de Azcuénaga, Domingo Belgrano Pérez, Lucas Manuel Belorado, Cristóbal Cabral de Melo, Francisco Conget Cordobés, Lorenzo Fernández de Agüero, Juan de Lezica y Torrezuri, Manuel López, Isidro Lorea, Antonio Meléndez de Figueroa, Francisco Miranda, Andrés Pacheco de Malaver, Andrés Pinazo, Juan José de Rocha, Alonso Rodríguez de la Peña, José Francisco Vidal y Juan Agustín Videla de Aguiar (Ver Apéndice I).

<sup>886</sup> Este proceso de valorización fundiaria es factible de ser mensurado también si contamos con la superficie total comercializada. Conociendo el valor venal del lote y multiplicado éste por el de la superficie total comercializada nos dará una cifra que deducida del volumen total de las operaciones inmobiliarias, indicará el valor venal de la construcción y mejoras. Las tasaciones de los bienes inmuebles en los pleitos capellánicos solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu dotó a su hijo Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que prescribía para la pared de cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4 reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de grueso, a 2 reales vara; y para la pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN, Protocolos, Registro 3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de 1800 la casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó una tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la pared sencilla de ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el texado con cañas y texas, 2 reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara; la vereda a la calle, 2 reales vara; y una parra \$4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años mas tarde, en 1806, los herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el barrio de Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido estaba en ese

---

año a 7 reales vara, un real más caro que en 1800, o sea con un 15% de aumento; el texado con texas y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara (AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

<sup>887</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 2, fs. 5.

<sup>888</sup> Idem.

<sup>889</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-13, Exp. 3, fs. 42. Igualmente, en los autos que seguía en 1789 contra Carlos García Perea, Juan Golovardes manifestaba que "...no se puede dudar que de algunos años [1779] a esta parte han perdido de su valor las fincas más de un 40%,...pues la casa comprada en 1779, estaban algo caras, por qué con la Guerra de los Ingleses había más abundancia de plata" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. U-1, Exp. 21, fs. 230).

<sup>890</sup> Idem.

<sup>891</sup> padre del Brigadier Cornelio Saavedra.

<sup>892</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-10, Exp. 8, fs. 31.

<sup>893</sup> Idem.

<sup>894</sup> Idem.

<sup>895</sup> ver Rosal, 1988.

<sup>896</sup> ver los trabajos compilados por Robinson (1990).

<sup>897</sup> para Cochabamba: Gordillo y Jackson (1987) y Larson (1988); para Chile: Borde y Góngora (1956); para el Perú: Ramírez (1991); y para México: Taylor (1972), Brading (1973) y Van Young (1983).

<sup>898</sup> Béaur, 1993, 142. Ultimamente, un equipo compuesto por una veintena de investigadores bajo la supervisión científica de Gaetano Cozzi y la dirección de Danilo Gasparini y financiados por la Fundación Benetton se hallan relevando la información notarial correspondiente a la campaña Trevigiani perteneciente a la Cámara Fiscal de Treviso (Derosas, 1991, 728-729).

<sup>899</sup> Béaur, 1993, 143. Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, mientras diversos autores (Prestas, 1989; Cornejo, 1945; Mata de López, 1990; Yofre, 1984; Maeder, 1981; Whigham, 1988; y Sala, Rodríguez y de la Torre, 1968) refiriéndose a Tarija, Salta, Córdoba, Corrientes y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; Schleh (1955) refiriéndose a Tucumán; Guzmán (1985) aludiendo a Catamarca; Castilla y Sod (1990), y Castilla y Adams (1990), haciendo referencia a La Rioja; López Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1992), Gelman (1992), Mayo y Latrubese (1993) y Garavaglia (1987, 1993), con relación a la región Bonaerense, nos informan que en dichas regiones existieron vecinos propietarios que eran terratenientes pero, por el contrario pequeños propietarios.

---

<sup>900</sup> Facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a otros compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>901</sup> Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>902</sup> permítaseme mencionar mi propio trabajo citado en Saguier, 1993c.

<sup>903</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6. Para el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (1989) reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, admiten cierta tendencia al aumento de sus dimensiones (Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 126 y 34. El déficit grave que presenta este análisis cuantitativo, que invalida sus conclusiones, consiste en la exclusión del ganado mular (Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, Cuadro 1 de Magdalena, Cuadro 3 de Areco en pp. 35 y 73, y descripción del Rincón de Pinazo, p.128). En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989) y Halperin Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la agricultura fué más relevante que la ganadería; Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990), y Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

<sup>904</sup> Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 126 y 34. El déficit grave que presenta este análisis cuantitativo, que invalida sus conclusiones, consiste en la exclusión del ganado mular (ver Cuadro 1 de Magdalena, Cuadro 3 de Areco en pp. 35 y 73, y descripción del Rincón de Pinazo, p.128).

<sup>905</sup> ver Zemborain, 1973; Saguier, 1983; Gaignard, 1989; y Basualdo y Khavisse, 1993.

<sup>906</sup> Coni, 1927, 128.

<sup>907</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>908</sup> el tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). El retracto era el derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones, que también existieron en el mundo anglosajón (Hoyle, 1995, 156), trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>909</sup> El Derecho Canónico prohíbe la enajenación de las tierras e inmuebles afectos a capellanías colativas sin el presupuesto permiso de la competente jurisdicción eclesiástica (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4, fs.189v.).

---

<sup>910</sup> ver Saguier 1984, 1985.

<sup>911</sup> Balmori y Oppenheimer, 1979.

<sup>912</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

<sup>913</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>914</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>915</sup> En esta Tabla se corrigen las cifras correspondientes a los años 1721, 1791 y 1808 publicadas en Saguier, 1993, Cuadro C-I, las cuales están erradas.

<sup>916</sup> de esta última cifra hay que deducir \$75.000 correspondientes al valor de una hacienda de cocales llamada Miraflores, existente en los Yungas, Alto Perú, que fuera vendida por Francisco Ramos Mexía y su esposa María Antonia Segurola.

<sup>917</sup> Borde y Góngora, 1956, Apéndice I, citado por Taylor, 1972, 141.

<sup>918</sup> Taylor, 1972, 141. Debo la lectura de este libro a la generosidad de mi amigo Carlos A. Mayo.

<sup>919</sup> Brading, 1972, 392.

<sup>920</sup> Van Young, 1983, 31.

<sup>921</sup> ver Birocco, 1992.

<sup>922</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

<sup>923</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

<sup>924</sup> AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

<sup>925</sup> Idem.

<sup>926</sup> hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y marido de Isabel Maciel (Crespo Naón, 1983, 66; y 1984).

<sup>927</sup> AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.111.

<sup>928</sup> Idem, fs.110.

<sup>929</sup> Idem, fs.110.

---

<sup>930</sup> Sobre el Marquesado del Valle de Tojo, Quesada (1992) ha publicado recientemente un enjundioso estudio.

<sup>931</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.G-4, Exp.17, fs.115.

<sup>932</sup> *Ibidem*.

<sup>933</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.5, fs.117.

<sup>934</sup> Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima. Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de *El borracho burlado* (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

<sup>935</sup> Barba, 1978, 222. Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le mandaba expulsar a los Jesuitas (Acevedo, 1969, 110). Carecía de vínculos de parentesco con familias locales. Para más detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

<sup>936</sup> Oficio del Cabildo de Tucumán al Virrey Vértiz, Tucumán, 12-III-1772 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Correspondencia, Sala IX, 22-2-6). En Córdoba, el Pbro. Dr. José Antonio Moyano asistió en calidad de vocal eclesiástico a la Junta Municipal de Temporalidades (Altamira, 1943, 165, nota 2). Para el caso del Perú, ver Aljovín de Losada, 1990.

<sup>937</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.25, Exp.623, fs.156.

<sup>938</sup> hijo del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar; y marido de María de Toledo Pimentel e Hidalgo Montemayor (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver también Cornejo, 1937, 167).

<sup>939</sup> Cornejo, 1979, 369; y Mata de López, 1990, 72.

<sup>940</sup> Hijo del Capitán Lorenzo de Escobar Castellanos Peñalva y de Lorenza de la Zerda Mirabal y Alvarez de Toledo; marido de María Magdalena Plazaola de la Zerda y Arcos; padre de Feliciano Castellanos, mujer primero del Coronel Agustín de Zuviría y luego de Vicente Toledo Pimentel; y hermano de Juan Bautista Castellanos, dueño de la estancia "San Lorenzo" (Cornejo, 1945, 38).

<sup>941</sup> Mata de López, 1990, 82.

<sup>942</sup> Mata de López, 1990, 81.

<sup>943</sup> Casado con Catalina Figueroa y Güemes, padre de Luis Avelino Costas, casado con Mónica López; de las hermanas Francisca y Catalina Costas Figueroa, casadas con los hermanos Robustiano y Domingo Patrón, hijos de Juan Gregorio Patrón y de Eugenia Escobar y Delgado; y de Liberata Costas, propietaria de la Estancia del Potrero de Incahuasi (Rosario de Lerma), mujer del realista Coronel Agustín de Gasteaburu (CC, VI, 191; Cutolo, III, 394).

---

<sup>944</sup> Cornejo, 1945, 116; y 1973, 49.

<sup>945</sup> Español americano, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. Don Mateo era hijo de José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José María (casado con Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de Saturnino (casado con Luisa Saravia). En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cuíos establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados --entre los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta-- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan Mendilaharsu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. En 1789 se abre una causa por habérsele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

<sup>946</sup> Según Cruz y Blanco (1990) aproximadamente el 80% de las tierras productivas de la provincia de Tucumán actual se hallaba en manos de los Jesuitas (Cruz y Blanco, 1990, 10).

<sup>947</sup> Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, item 150).

<sup>948</sup> Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Marido en primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y en segundas nupcias en 1758 de Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel La Madrid; y tío político de Cayetano Rodríguez y de Cayetano Fernández Moure (Avila, 1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, item 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

---

<sup>949</sup> En 1774 alegaba "...no tener tierras ningunas, ni crecida familia, y el privilegio de Regidor y los muchos servicios a las Temporalidades desde la ora de la expulsión, en que alisté el paisanaje, y puesto en armas tomé las avenidas del colegio, leí e intimé el Real Decreto, y por falta de escribano actué cuantas diligencias hubo asta la más mínima carta; serví un año en calidad de Intendente de las Haciendas, pasé después a hacer Inventarios de las de Guazán y Aconquija, y de Diputado por este Ilustre Cabildo desde que se formó la Junta asta el año 72 y Ultimamente el deslinde, mensura y amojonamiento de las tierras bajas" (Francisco Tejerina al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 29-VIII-1774, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>950</sup> Mallorquín, hijo de Gabriel Rubert y Jacinta Ballester, y marido de María López, hija de Francisco López y de Damiana Aráoz (Corominas, 1987, ítem 234). A juicio de Ruiz Poyo, Rubert "...se a ocupado con esmero en el cuidado del Colegio, de la Iglesia, Librería, y Ornamentos y en reedificar las clases, los corredores, de los Aposentos, y la sacristía, que se allavan quasi arruinados, y necesitaban de pronto reparo, para su conservación y asimismo ha atendido a los conchavos, y pagamentos de los peones que se han ocupado en las haciendas de campo, y en bender algunas cosas, de las que estas producían" (José Fermín Ruiz Poyo al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 1-V-1774, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>951</sup> Hijo del Maestre de Campo Nicolás Romano Pastene y de Agueda Palavecino, marido de María Inés Silva, hija del Sargento Mayor Ignacio de Silva y Bohórquez y de Francisca de Herrera y Guzmán; y hermano de Felipe Romano Pastene, marido de Francisca de Borja Campero, hija del Sargento Mayor Juan José Campero y de Petronila García de Valdés (Corominas, 1987, ítem 120 y 143).

<sup>952</sup> Vicente Escobar, Francisco Texerina, Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, Gabriel Rubert y Gerónimo Román al Presidente de la Superior Junta de Temporalidades, Tucumán, 20-XII-1771 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>953</sup> Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid] (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>954</sup> "...En razón de decir la cantidad que se podrá recojer deste ganado no es fácil hasertivamente informar a Vm.por estar del todo alzado, y componerse su habitación de quebradas muy ondas, Bosques, y asperezas fragosas, aunque por lo que he bisto, andando personalmente por las cumbres, faldas, y ciénagas donde sale por primavera y verano podré afirmar que habrá 3.000 o más cabezas de ganado el cual por Otoño, e invierno se avriga, y acoje en lo más encumbrado de los montes, y en lo más profundo de las

---

quebradas, y abrigado de los bosques y peñas resiste los rigores de jelos y nieves, y de allí no hai poder que los saque sin con mucho trabajo, mucho señuelo, y sobradas industrias,...y en conclusión de todo sin señuelo es imposible cojer ganado sino a lazo una a una, porque si aquel potrero fuera de cañadas limpias, llanos, o nabas tendidas se podía cojer el ganado en pelotones a fuerza de correrlo, y sujetarlo cansado, aunque fuese sin señuelo" (Luis de Aguilar a José Fermín Ruiz Poyo, Tucumán, 30-XII-1773, AGN, Temporalidades de Tucumán, IX, 22-2-6).

<sup>955</sup> Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969).

<sup>956</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.278; R.1, 1769, fs.237; R.5, 1769, fs.143; R.6, 1770, fs.1; R.6, 1773, fs.78v.; y R.5, 1773, fs.98v., 95v., 87v., 75, y 72v.

<sup>957</sup> Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (CC, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; CC, I, 71; y Cutolo, I, 191).

<sup>958</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1773, fs.52v.

<sup>959</sup> Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con Maria Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina (Corominas, 1987, ítem 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia

---

al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83)

<sup>960</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1768, fs.75; R.4, 1768, fs.227v.; R.6, 1768, fs.82v.; R.4, 1771, fs.229v. y 234; R.6, 1771, fs.9; y R.6, 1774, fs.63v. y 81.

<sup>961</sup> Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986, 140.

<sup>962</sup> Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Manuel López y de María Ríos, casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira). Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214).

<sup>963</sup> Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado en 1760 con Teresa Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo, concuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro del poeta popular Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, ítem 204; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 399). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

<sup>964</sup> hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima hermana María Josefa Goncebat y Paz, hija de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con Plácida Mariño Castro.

<sup>965</sup> AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

<sup>966</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.20.

<sup>967</sup> Idem.

<sup>968</sup> Rosenzvaig, 1987, 129, nota 247.

<sup>969</sup> Piñero, 1885, 579-586; y Cornejo, 1981, 71ss.

<sup>970</sup> Dueño de Santa Catalina por compra a las Temporalidades. Español, casado con María del Carmen Albornóz y Carranza, hija de José de Albornóz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (CC, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

<sup>971</sup> Dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y marido de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era padre de Victorino Rodríguez, casado con Felipa

---

Antonia Tagle y Castro (Moyano Aliaga, 1983); de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral Juan Justo Rodríguez (LC, I, 336).

<sup>972</sup> Compró la estancia San Ignacio, en Calamuchita, que fué de la Fundación de Ejercicios, con parte de sus muebles, y semovientes, cuya compra la hizo en dos remates, y ascendieron ambos a la cantidad de \$32.366 con la expresa condición de pagar su monto por tercias partes una cada año y de serle arbitrario el pagar los réditos o el principal, como consta de escritura otorgada en 29 de octubre de 1773 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64).

<sup>973</sup> Compró la estancia de Jesús María en \$43.791 con el plazo de diez años, que principió a correr el 29 de julio de 1775 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64; y Justicia, Leg.15, Exp.353).

<sup>974</sup> Compró la estancia de la Candelaria, en Cruz del Eje, con parte de sus muebles y semovientes en \$19.352, que debía pagar en 17 de Diciembre de 1774 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64; y Sarria, 1984, 501-566). Al parecer no alcanzó a pagar pues diez años después la misma estancia fué vendida a José de Isasa y Ayesta.

<sup>975</sup> Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica ubicada en Cruz del Eje, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15)

<sup>976</sup> Bruno, 1967, VI, 527-529.

<sup>977</sup> Pérez Colman (1936) y Elía (1961) nos ofrecen la descripción del "Potrero de San Lorenzo", compuesta de las estancias El Sauce, La Centella, La Estancia Grande, El Rincón, La Sesteada, y El Naranjal, comprendiendo todo sesenta leguas cuadradas, ubicadas entre los ríos Gualaguaychú y Uruguay, pertenecientes al Coronel Juan Ignacio de Elía, y luego a su hijo Angel Mariano de Elía; y Morquio Blanco (1990) la descripción de la que fuera la estancia de la Hermandad de la Caridad. En la enorme propiedad del "Potrero de San Lorenzo" se fundó el primer criadero de cerdos del Río de la Plata, con el fin de avituallar a los navíos surtos en el Apostadero naval de Montevideo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.M-18, Exp.14). En 1807 Pedro José de Elía declara a su hermano Dr. Agustín Pío de Elía que el 1-VI-1807 compró a su otro hermano Angel Mariano "...los ganados vacunos y caballares y derecho posesorio a las tierras realengas nombradas el Nancay y las que también fueron de Juan Díaz, socio de Francisco Panelo, con las estancias siguientes a saber la nombrada Principal, la de las Seibas, Esquina, Santo Angel, Santa Rosa, Punta del Monte, Maciegas, Isla del Tigre, y Alarcón, y consiente en que su hermano el Dr. Agustín Pío de Elía solicite para sí la gracia de la propiedad (AGN, Protocolos, Registro 3, 1807, fs.151v.).

---

<sup>978</sup> Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 285.

<sup>979</sup> Nacido en Belvis de la Jara, Toledo, marido de María Florencia Belgrano y González, hija de Domingo Belgrano Peri y de María Josefa González; y cuñado del General Manuel Belgrano (FB, III, 281).

<sup>980</sup> Sala de Touron, et. al., 1968, 41.

<sup>981</sup> Sala, Rodríguez y De la Torre, 1968, 27, 29 y 30

<sup>982</sup> Marido de María Antonia Sosa Avila y Dávalos, y suegro de Eugenio José Balbastro y de Francisco Martínez Nieto (FB, I, 57).

<sup>983</sup> Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 175.

<sup>984</sup> Aguirre, 1951, XX, 187-193.

<sup>985</sup> Alvarenga, 1978, 205 y 252.

<sup>986</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4.

<sup>987</sup> Aguirre, 1950, XIX, 165.

<sup>988</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>989</sup> Apéndice II, columna 4 (Maeder, 1981).

<sup>990</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.110, Exp.8, fs.8.

<sup>991</sup> hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de María del Carmen Acosta (FB, III, 153).

<sup>992</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.106, Exp.1.

<sup>993</sup> Natural de Granada de Nicaragua, reino de Guatemala, hijo del Teniente Coronel José de Rocamora y Mendoza y de Jacinta Sardiez del Castillo, marido de María Ramona Ibáñez, hija del Brigadier Pascual Ibáñez y de María Francisca Rospigliosi; y suegro de Marcos González Balcarce (FB, IV, 45; y V, 329). Ver Demonte y Troncoso (1972).

<sup>994</sup> Pérez Colman, 1936, II, capítulo XIII, 183ss., citado por Arce, 1977, I, 207.

<sup>995</sup> Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

<sup>996</sup> Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con Antonia Manso, hija de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana Ramona de Larramendi, mujer del Gobernador Francisco Antonio Candioti (Crespo Naón, 1983, 70).

<sup>997</sup> Pérez Colman, 1936, II, 296.

<sup>998</sup> En Buenos Aires el paradigma de esta conducta fué a comienzos del siglo XIX el

---

dueño de la estancia "Los Cerrillos" y Comandante de Campaña de la provincia de Buenos Aires General Juan Manuel de Rosas; en Tucumán el General Bernabé Aráoz, dueño de estancias en Monteros; y en Entre Ríos, el Brigadier General Justo José de Urquiza.

<sup>999</sup> Rázori, II, 400-402

<sup>1000</sup> Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fue designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fue 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

<sup>1001</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Escrito elevado al Virrey Joaquín del Pino por un numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por la creciente escasez de mano de obra provocada por el reclutamiento de milicianos para el fuerte de Orán.

<sup>1002</sup> María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada; y madre de Julián Gregorio de Zegada.

<sup>1003</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1004</sup> *Ibidem*.

<sup>1005</sup> Rázori, II, 401-402.

<sup>1006</sup> Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta. Fue suegro de los Gobernadores de Tucumán Alejandro y Felipe Heredia. Alferez de Milicias en 1780, Teniente en 1782, y Capitán en 1784. Acompañó a su padre en la navegación del Río Bermejo. Creó el regimiento de caballería "Patricios de Salta", y luego el General Pueyrredón le quitó el mando y le llenó de desaires a consecuencia de lo cual falleció en 1811 (Cutolo, III, 52).

<sup>1007</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1008</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1009</sup> *Ibidem*.

<sup>1010</sup> había comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de Milicias en \$500 (Correa Luna, 1918, 225).

<sup>1011</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.16.

<sup>1012</sup> ver Pivel Devoto, 1964.

---

<sup>1013</sup> ver Saguier, 1991.

<sup>1014</sup> Brito Stéfano, 1953, 354. Debo esta interesante observación bibliográfica a la gentileza del colega Osvaldo Pérez.

<sup>1015</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.M, n.15, 1823.

<sup>1016</sup> ver Birocco, 1993.

<sup>1017</sup> para la segunda mitad del siglo XVII, ver Saguier, 1981, cuadros 42 y 45, pp.513 y 518, y apéndices 57, 58 y 106, pp.704-708, y 802-804; reproducidos en Moutoukias, 1988, cuadro 17.

<sup>1018</sup> Al respecto Moutoukias reproduce algunas Tablas incorporadas en un manuscrito inédito de mi autoría (Moutoukias, 1988, 175-187.

<sup>1019</sup> AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

<sup>1020</sup> *Ibídem*.

<sup>1021</sup> *Ibídem*. Por el mes de Febrero de 1769, pasando Francisco Frois por el partido de los Arroyos y capilla de San Nicolás, Nicolás Quiroga, vecino de San Juan, arriando cargas de aguardiente y expendiendo aquellas a que se proporcionaba comprador, Frois "...entró a tratar con el dicho y en efecto les compró siete cargas los que les satisfizo con porción de grasa y sebo y diferentes animales en pie compuestos de 40 mulas, 2 caballos y una manada de yeguas y con la marca de Miguel González de aquel vecindario iban once mulas erradas en la anca de uno y otro lado las cuales entregó de cuenta de Andrés Alvarez de Calo, mozo administrador de una tienda del otorgante, quien usaba de aquella marca con permiso de Miguel González dueño de ella, y continuó hasta que la prestó a Don Juan de Urdinarana posterior a aquella venta y por demanda de Urdinarana se hallan las once mulas embargadas pretendiendo derecho a ellas" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1771, fs.121v.).

<sup>1022</sup> AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

<sup>1023</sup> *Ibídem*.

<sup>1024</sup> *Ibídem*.

<sup>1025</sup> Acuerdos, 3a Serie, I, 19-20, 26-27, 32, 87-91, 94, 99, 102, 204, 232, 331, y 337.

<sup>1026</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Hacienda, Leg.142, Exp.3.640. En Catamarca "...los que siembran le quitan agua a la ciudad", ver AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11, fs.24-30; y un Reglamento de Aguas, en AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11, fs.35v.-39v. Para conocer este tipo de economía ver Supplee (1988), Dougnac y Barrientos (1991), Lipsett-Rivera (1992) y Tamayo Flores, 1992, 107-142.

<sup>1027</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v. y 91-93v.).

<sup>1028</sup> Fontana, 1962, 73. Estos fueron: Jacinto Molina, José Rodríguez Figueredo, Tomás Alvarado, Hilarión Jurado, Mateo Contreras, Mercedes Astorga, el Alcalde de segundo voto en 1776 Francisco Corvalán, Justo Cepeda, Lucas Obredor, Julio Morel, el Alcalde de

---

segundo voto en 1779 José Marcos Aragón, José Miguel Castro, el Alguacil Mayor Fermín Martínez de Virgala, el Alcalde de Hermandad José León Torres, Julio Antonio Sarmiento, José Ferreyra de la Cruz, Manuel Adalid Rodríguez, el Administrador del Correo Félix Sáez, el Alcalde de segundo voto en 1793 Bernardo Sarmiento, Narciso Aguirre, Nicolás Medina, Nicolás Segura, José Francisco Amigorena, Mateo Isidro Maza, los Alcaldes de Hermandad José y Manuel Videla, Pedro Videla y Francisco Coria. Hilarión Jurado fué bautizado en 1749, hijo de Fernando del Cerro Jurado y Gómez y de Bernarda Correa de Saa y Pardo Parragués, hermano de Gavino Jurado, y cuñado de Francisco Vargas, Pedro Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta. Francisco Corvalán era hijo del Maestre de Campo Juan Luis Corvalán de Castilla y Arias Molina, y de Angela Chirinos de Posada y Toro Mazote, casado con María del Carmen Martínez de Rozas Correas, hija de Juan Martínez de Rozas López Piñero y de María Prudencia Correas de Larrea Villegas, padre de los Guerreros de la Independencia Francisco, José, y Juan Corvalán, y suegro de José Agustín de Sotomayor Videla, de Genaro Segura Correas, de Joaquín de Sosa Lima, de Manuel Lemos Cruz, y de Cruz Vargas. Fermín Martínez de Virgala era casado con Bentura Alvarez, perteneciente a una antigua familia local. Martínez de Virgala sostuvo en Mendoza en 1795 célebres litigios de disenso al oponerse al matrimonio de su sobrina política Severa Esquerra, la hija de Baltasar Esquerra y Manuela Alvarez, con José Julián Videla, hijo natural de José Lorenzo Videla y de Candelaria Suárez, así como al de su hijo Francisco Antonio Virgala con María Solana Riveros, hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte. José León Torres casó en 1777 con Bernardina Lemos, hija de Onofre Lemos y María Antonia Corvalán, hermana del Pbro. Diego de Lemos y del Coronel Juan Gregorio de Lemos. José Francisco Amigorena casa con María Prudencia de Escalante. En 1779 representa contra el Alguacil Mayor y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30) (Morales Guiñazú, 1939, 181; AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp.11 y 8; y CC, V, 184).

<sup>1029</sup> La estancia llamada de Arriba fué comprada en agosto de 1777 a las Temporalidades por María Prudencia Correas, mujer de Juan Martínez de Soto y Rozas, suegros de Francisco de Borja Corvalán, Miguel de Téllez Meneses, y Tomás de Lima Melo y Jofré (Archivo Histórico de Mendoza, Carpeta No.18, Documento N.112)

<sup>1030</sup> Hoyle, 1995, 156.

<sup>1031</sup> Weber, 1977, II, 692, citado por Giddens, 1977, 274.

<sup>1032</sup> Luque Colombres, 1988, 389-400.

<sup>1033</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.224, Exp.1 y 8.

<sup>1034</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

<sup>1035</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

<sup>1036</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16.

---

<sup>1037</sup> junto con el obraje de San Juan de Taray era una de las dos empresas textiles más importantes del Cuzco (Glave y Remy, 1983, 225). Romano (1991) revela que cuando los Jesuitas fueron expulsados y el Obraje de Pichuichuro fué tomado por el Ramo de Temporalidades, este se destruyó pues el R.P. Ojeda S.J., que estaba a cargo del mismo, se vengó de la decisión de la corona perdonando a los indios sus deudas (Romano, 1991, 260).

<sup>1038</sup> una capellanía lega, en la cantidad de \$6.000, cuyos patrones y capellanes habían de ser en primer lugar Don Andrés Bravo del Rivero, hijo del Oidor Decano Pedro Bravo del Rivero; en segundo Don Tomás Argüelles y Trelles; y en tercero el Dr. Vicente de la Puente; una capellanía colativa en \$4.000 cuyos patrones habían de ser en primer lugar Don Manuel de Encalada, en segundo el hijo de Rosalía Antequera, y en tercero el hijo de María Calderón llamado Juan Bernardino; otra capellanía colativa en igual cantidad cuyos patrones habían de ser en primer lugar el Lic. Miguel Sierra, en segundo el hijo mayor de Antonio Arredondo, y en tercero su aijado el hijo legítimo de Gregorio López Boado; otra capellanía colativa en igual cantidad cuyos patrones habían de ser en primer lugar Don Vicente Bravo y en segundo y tercer lugar sus dos hermanos hijos legítimos del Maestre de Campo Leonardo José Bravo con prelación del mayor al menor; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el sobrino de Doña Melchora Reinia, llamado Ambrosio, en segundo uno de los hijos de José Marchán, y en tercero el hijo mayor de [Receptor de Diezmos de Huarcocondo] Tomás Lecaros; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Lic. Tomás de Gorbenia, en segundo el hijo de Leandra Lobatón, y en tercero su aijado el hijo del General Tomás de Nafría; otra capellanía en igual cantidad, en primer lugar el hijo de Doña Anselma Pacheco nombrado José Aguilar, en segundo el hijo de Juan de Mendoza que entonces estaba en poder de su sobrino Don Matías, y en tercer lugar el huérfano de Doña Bernardina de Benavente llamado Pablo "...con advertencia que si mis sobrinos Don Matías y Don Vicente Mendoza tuvieren hijos habidos en legítimo matrimonio deben ser estos preferidos a cualesquier otros sujetos"; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Centeno [nieto del Corregidor Antonio Centeno], en segundo el hijo mayor de Antonio Arredondo, y en tercero uno de los hijos de Don Sebastián de la Concha; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar uno de los hijos legítimos de Josefa Antequera "...que todavía permanezca estudiando en el Colegio de San Antonio de Potosí", en segundo el hijo del Escribano difunto Felipe de Mesa el mayor, en tercero el hijo de Manuel de Mollinedo y Doña Isabel de Villavisencio, y en cuarto lugar el Dr. Marcos Merambio; y finalmente otra capellanía colativa de igual cantidad, en primer lugar uno de los hijos pequeños de Mateo de la Sota, en segundo el sobrino del Dr. Francisco Virto llamado Don Francisco, y en tercer lugar el que quedare de los hijos del General Mateo de la Sota; y finalmente otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Puente, en segundo los hijos legítimos del Contador Mariano Maruri, y en tercero Manuel Caviedes y Loaiza (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.).

<sup>1039</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>1040</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

<sup>1041</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

<sup>1042</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

---

<sup>1043</sup> hijo de Antonio del Portal y Arduz y de María Josefa Vieyra de la Mota y Tobalina; marido de Manuela Frías Castellanos, hermana del Pbro. José Domingo Frías; padre del Alcalde José Antonio del Portal y del R.P. Manuel Ignacio del Portal; suegro del Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante; y primo hermano de José Francisco Vieyra y del Pbro. Alexo Vieira, hijos de Francisco de Vieyra y de Gabriela de Argañaráz y Murguía (Zenarruza, 1991, I, 416).

<sup>1044</sup> hijo del Cap. Juan Rodríguez Viera.

<sup>1045</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4.

<sup>1046</sup> Idem, fs.196v-197.

<sup>1047</sup> Reyes Gajardo, 1940, 176.

<sup>1048</sup> hijo de José Arias Rengell y de María Pardo de Figueroa; hermano de Felix Arias Rengell; y cuñado de José Ruiz de los Llanos y de Justo Saravia Martínez Sáenz; y contrajo primeras nupcias con Isabel Torino de Viana y segundas nupcias con Zenona López de Villanueva (Calvo, I, 89).

<sup>1049</sup> Cornejo, 1945, 202; y Vergara, 1946, 32-33. En primer Patrono de la Capellanía se había constituido el propio fundador, Pbro. Juan José Arias, y en adelante su primo el Pbro. Fernando Arias Rengel, o en caso de faltar la línea de Don Francisco Gabino Arias Rengel (hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria Hidalgo Montemayor; y marido de Felicianita Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía que entraría su otro primo Don Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

<sup>1050</sup> hijo de Bernardo del Campo y de Andrea de Paz y Figueroa; marido de Juana Medina, hija de Juan de Medina y de Catalina de Artaza; y tío de Micaela del Campo y Orna, viuda de Francisco Neyroto (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba [AAC], Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del Centro de Historia Familiar [CHF]] perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF).

<sup>1051</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

<sup>1052</sup> alumno de Victorino Rodríguez (Luque Colombres, 1945, 27, nota 51).

<sup>1053</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

<sup>1054</sup> Pomer, 1985, 218.

<sup>1055</sup> AAC, Libros de Capellanías, Leg.31 (Microfilms depositados en el CHF).

<sup>1056</sup> hija de Agustín Salvatierra y de Sebastiana López de Velasco, y nieta del Maestre de Campo José López de Velasco y de Magdalena Sánchez Sambrano.

<sup>1057</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.158, Exp.4. Esta estancia de

---

Tenené se hallaba a 14 leguas de la estancia de la Ramada, de Jose Barthelemi Berdugo e Isabel García Aráoz; a 10 leguas de la estancia del Palomar, de Isabel Alfaro; y a 6 leguas de la estancia del Zapallar, de Miguel Aráoz (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.178, Exp.4, fs.2V.). El Maestre de Campo Diego de Aráoz llegó a manifestar que era cierto que la estancia del Zapallar "...la tuvo prestada su hermano por escritura, pero que no sabe si comprendió en el préstamo dicho Paraje porque en los años de catorce o quince habiendo hecho las mensuras por orden del Sr. [Estéban de] Urizar, Don Gregorio Martínez Salazar, le señalaron otras tierras a Don Juan Gregorio Aráoz su hermano, heredero de dichas tierras de la quebrada del Río Meume, y como dicho Juan Gregorio estaba poblado en las dichas tierras que le señalasen estaba en la inteligencia de que esas eran las tierras que le señalaron por suyas, hasta que el año de veinte y seis, o veinte y siete según quiere acordarse habiendo venido la Dueña de las tierras de la ciudad de Santa Fé, que lo era Doña Magdalena Baquedano, lo lanzó de ellas, y como el enemigo continuaba en dichos parajes, no dió lugar para pedir nueva mensura quedando los enemigos poseyéndolas, y luego que se ahuyentó el enemigo las vendió Don Juan Gregorio que fué el año de cincuenta y cinco a su hijo Pedro Antonio Aráoz" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.178, Exp. 4, fs.35v.).

<sup>1058</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.188-189.

<sup>1059</sup> AGN, División Colonia, División Colonia, Leg.243, Exp.4, fs.192-201.

<sup>1060</sup> hijo del General Manuel de Villafañe y de Francisca de Tejeda y Guzmán.

<sup>1061</sup> Rázori, III, 337.

<sup>1062</sup> hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668, del Centro de Historia Familiar).

<sup>1063</sup> marido de María Dominga Carreño Bazán, y padre de Juan Manuel de Castro Carreño, colegial en el Seminario de Monserrat.

<sup>1064</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

<sup>1065</sup> Idem, fs.18.

<sup>1066</sup> Ibídem.

<sup>1067</sup> Ibídem.

<sup>1068</sup> hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, y de Petronila Molina Navarrete, sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; y marido de Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana (Calvo, 1924, 164).

<sup>1069</sup> Domingo Garay al Virrey, Hacienda de Ansacate, 6-VI-1782 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5].

<sup>1070</sup> Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.1, 1791, Leg.415, Exp.1.

- 
- <sup>1071</sup> AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119.
- <sup>1072</sup> AHC, Escribanía N.1, Leg.415, Exp.1.
- <sup>1073</sup> AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19.
- <sup>1074</sup> Fasolino, 1963-65, 29.
- <sup>1075</sup> hijo del Maestre de Campo Juan de San Martín y de Gerónima Gutiérrez de Paz, y marido de su prima María Rosa de Avellaneda y Aguirre (FB, VI, 40).
- <sup>1076</sup> las beatas María Nicolasa y María Melchora Gámiz de las Cuevas.
- <sup>1077</sup> hijo del Teniente José de Bolaños Maldonado y de Bernarda Josefa Gámiz de las Cuevas (FB, III, 118).
- <sup>1078</sup> hijo del Teniente Francisco Escudero y de Ana Margarita de Cossio y Terán (FB, II, 293).
- <sup>1079</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, 1770, fs.102.
- <sup>1080</sup> marido de Inés Jijano, seguramente hija de Juan Antonio Jijano y de Ana Fernández de Castro.
- <sup>1081</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1809, fs.128v.
- <sup>1082</sup> González, 1957, 176.
- <sup>1083</sup> marido de María Luisa Velos, hija de Andrés Velos y de Petrona Gómez (FB, IV, 316).
- <sup>1084</sup> contrajo primeras nupcias en 1748 con Juana de Melo y segundas nupcias en 1749 con Juana Romero (FB, V, 401).
- <sup>1085</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1759, fs.50v.
- <sup>1086</sup> Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67.
- <sup>1087</sup> Acuerdos, III Serie, I, 146-148.
- <sup>1088</sup> Acuerdos, III Serie, I, 247-251.
- <sup>1089</sup> Acuerdos, III Serie, I, 552, 568.
- <sup>1090</sup> Acuerdos, III Serie, II, 604.
- <sup>1091</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.52.
- <sup>1092</sup> Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 79.
- <sup>1093</sup> hijo de Bartolo Juárez y Damiana Garzón.

- 
- <sup>1094</sup> AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.132.
- <sup>1095</sup> marido de Petrona López Camelo, y padre de 13 hijos (FB, IV, 246).
- <sup>1096</sup> AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.175v.; y AGN, Protocolos, Reg.3, 1734, fs.148.
- <sup>1097</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1735, fs.427v.
- <sup>1098</sup> hijo de Marcos López Miregildo y de Isabel Juárez y marido de Luisa de Salazar (FB, IV, 165).
- <sup>1099</sup> AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-4, fs.457; y Protocolos, Reg.5, año 1752, fs.212v.
- <sup>1100</sup> AGN, Protocolos, Registro 2, 1787, fs.468.
- <sup>1101</sup> Lamentablemente esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.
- <sup>1102</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1824/25, fs.318. Francisco Suero, hijo de Francisco Suero y González, asturiano, y de Juana de Giles Remón, que fuera Defensor judicial de los bienes de Miguel de Riglos, fue procesado por maltrato a su hermana Ana Suero, a instancias de la denuncia de su prima Gerónima de Noriega (AGN, Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.14).
- <sup>1103</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16; Leg.224, Exp.8 y 9; Leg.255, Exp.41; Leg.M-3, Exp.4; Leg.M-11, Exp.5; Leg.R-15, Exp.6 y 7; y Leg.Z-4, Exp.5 y 9; Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.8v.; y Tribunal Civil, Leg. A-11 y Leg.A-18.
- <sup>1104</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.M-11, Exp.5, fs.14-16.
- <sup>1105</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1776/77, fs.284.
- <sup>1106</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.34v.
- <sup>1107</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1818/1819, fs.293.
- <sup>1108</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A-18.
- <sup>1109</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1825, fs.403v.
- <sup>1110</sup> En Areco, solo dos familias sufrieron dicha experiencia; los Monsalve y los Peñalva. En Arrecifes, los Lozano y Gómez de Saravia, Magallanes, Pozo y Silva, y Sosa. En los Arroyos, los Castro y Borda, Olmos, Tabares y Ugarte. En el paraje de las Hermanas, los Gutiérrez y los Peñalva. En el paraje de los Hornillos, los Gómez y los Leyba. En la Cañada de la Cruz, los Casco de Mendoza, Gelves, Castro, Correa, y Monsalve. En el paraje de la Cañada Honda, los Benávidez, En el paraje del Arroyo Tala (San Pedro), los Chacón y los Gutiérrez. En el Rincón de Zárate, los Zárate. En el pago de las Conchas, los Valdivia, Báez de Alpoin, Islas, Ibarrola, Torrellas, Vega y Villoldo. En la Cañada de Morón, los Figueroa, Salazar, y Rivas. En Luján, los Avalos, Vallejos, Benencia, Burgos, Castro, Cruz, Cuevas, Díaz Altamirano, Leguizamón, León, Lobo Sarmiento, Melo, Palomeque, Peñalva, Avila y Ramírez, Rodríguez Flores, y Rodríguez de la Torre. En

---

Escobar, los Pinazo y los Benavídez. En la Magdalena, los Arce, Arroyo, Avellaneda, Benavídez, Illescas, Rincón, Gil Negrete, Gómez de Saravia, de la Canal, Lara, Sosa, Lozano, y Velasquez. En la Matanza, los González de Acosta, Gutiérrez, y Naharro. Y en la Costa de San Isidro, los Gómez y León, Cueli, Cuello, Herrera, Márquez, y Castro Pavón.

<sup>1111</sup> Birocco, 1992b, 84 y 86.

<sup>1112</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1814, fs.245; y Reg.3, 1818, fs.178v.

<sup>1113</sup> AGN, Protocolos, Lujan, tomo II, fs.356v., 357, y 357v.

<sup>1114</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1861, fs.286.

<sup>1115</sup> AGN, Protocolos, Lujan, II, fs.214.

<sup>1116</sup> AGN, Protocolos, Lujan, I, fs.822 y 871v.

<sup>1117</sup> AGN, Protocolos, Luján, III, fs.9

<sup>1118</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1824/25, fs.477.

<sup>1119</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1757/58, fs.366v.; y 375v.

<sup>1120</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1824, fs.88.

<sup>1121</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1837, fs.674v., y 174v.; Reg.2, 1838, fs. 569, 572, 168, y 549v.; y Reg.2, 1839, fs.316, y 757v.

<sup>1122</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1825, fs.103v.

<sup>1123</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1826/27, fs.40v.

<sup>1124</sup> M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz Soldán, 1868-74, I, 27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389.

<sup>1125</sup> Spalding, 1974; Murra, 1987; Saignes, 1987; Stern, 1987; y Zulawski, 1987.

<sup>1126</sup> Assadourian, 1979, 284.

<sup>1127</sup> Schwartz, 1979, 19.

<sup>1128</sup> Golte, 1980, 206.

<sup>1129</sup> "...las Encomiendas en esta Provincia se dividen en dos clases, según el principio que trahen desde los tiempos de la Conquista: unas que forman Pueblos, viviendo en Comunidad, con tierras propias al cargo de un Ecónomo que dirige sus temporalidades que se llaman de indios mitayos o mitarios, y las otras de Indios que sin formar Población, ni tener tierras propias pasan de unos a otros feudatarios, morando siempre en las Estancias, Chacras y Casas de estos, intitulándose originarios; los primeros pagan el tributo con un vimestre de servicio personal al año, a saber, los varones desde la edad de 18 años hasta los

---

50, sin más retribución de parte del Encomendero, que el escaso sustento con que los sufragaban en los dos meses; los segundos son verdaderamente esclavos, porque no tienen libertad, con sola la diferencia de no poderlos vender, ni dejar por herencia, lo cual hace aún de peor condición la constitución de los indios originarios que sirven toda la vida al Encomendero, de quien reciben un moderado alimento, y un vestuario muchas veces escaso, no siendo menos la asistencia de que carecen en lo Espiritual, según me hallo informado" (Joaquín Alós al Virrey Nicolás Arredondo, Asunción 19 de Enero de 1793 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.28, fs.36v.-37]).

<sup>1130</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>1131</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes la circulación de pago en pago.

<sup>1132</sup> Halperín Donghi, 1963, 105; y Saguier, 1986. Larson (1979) cosechó el crédito de haber investigado la diferenciación de la estructura social de las comunidades indígenas del Alto Perú; Endrek (1966, 1967) tuvo el mérito de haber investigado en fuentes censales el mestizaje producido en Córdoba y Tucumán; Caillet-Bois (1966) y Robinson (1974) la composición étnica de las nuevas poblaciones fundadas durante las Reformas Borbónicas; Cruz y Blanco (1990) la despoblación indígena del Tucumán; Punta (1990) la desaparición de la encomienda en Córdoba; Susnik (1965, 1990-91, 1993) y Cooney (1990) la deserción de los peones de las barcazas provenientes de Asunción en los siglos XVII y XVIII; Carbonell (1992) la fuga de indios de los Pueblos de Misiones; Salvatore (1991, 1992) el reclutamiento militar y la proletarización de la campaña Bonaerense de comienzos del siglo XIX; y Halperín Donghi (1963) el origen geográfico de la mano de obra rural de Tandil en el siglo XIX.

<sup>1133</sup> titulares de los repartimientos de indios mitayos.

<sup>1134</sup> Saguier, 1984, 54, Tabla 5.

<sup>1135</sup> ver Grosso Lorenzo, 2004, 57.

<sup>1136</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>1137</sup> Garavaglia, 1983, 314-317.

<sup>1138</sup> antiguamente dado en encomienda a Cristóbal Domínguez.

<sup>1139</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.1.

<sup>1140</sup> ver Sánchez Albornóz, 1978; y Anexo A-I.

<sup>1141</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890, sin foliar.

<sup>1142</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890. Ver también, Presta, 1989, 50.

<sup>1143</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1144</sup> permítaseme citar mi trabajo, Saguier (1989).

---

<sup>1145</sup> Tord Nicolini y Lazo, 1981, 207.

<sup>1146</sup> contribución anual de un peso de ocho reales servida a los curas por los indios casados.

<sup>1147</sup> proveniente de cuatro pedazos de tierras, que las sembraban los indios con este destino para su Cacique. En el partido de Larecaja, Provincia de La Paz, dichas cahacras se denominaban la chacra del Molino; la de Lambramani; la de Mansanani; y la de Achabaya (AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845).

<sup>1148</sup> AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845, citado en Anexo A-I.  
En la Doctrina de Songo, Partido de Larecaxa, "...las clases de Originarios, Forasteros Legítimos y forasteros ylegítimos que satisfacían los primeros a doce pesos un real y un quartillo reales, y los terceros a cinco pesos dos y tres quartillos reales por año, y su mitad por tercio las redujo unicamente a la de Originarios a razón de siete pesos al año, y su mitad por tercio" (AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845, citado en Anexo A-I).

<sup>1149</sup> Klein, 1973, citado en Sánchez Albornoz, 1978, 194, nota 12.

<sup>1150</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1151</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1152</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1153</sup> Sánchez Albornoz, 1978, 194, nota 12.

<sup>1154</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1155</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1156</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1157</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1158</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1159</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1160</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1161</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1162</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>1163</sup> Susnik, 1965, 135.

<sup>1164</sup> Barrios Pintos, 1973, 53-55.

<sup>1165</sup> Robinson, 1974, 19.

<sup>1166</sup> Lozano, 1731, 380 y 385; Charlevoix, 1910-1916, IV, 254-295; Gandía, 1929, 175; y

---

Furlong, 1941, 44-45. Diecisiete años más tarde, en 1728, su sobrino carnal, Juan de Armaza y Arregui, produce una Información de Testigos con la cual abonar la solicitud de Confirmación Real de la encomienda, quienes aseveran el buen estado y tratamiento recibido por dichos indios, asistidos por los Franciscanos Fr. Pedro Quintana y Fr. Francisco de Alcántara y por el Capellán Fr. Juan de Arregui. Fueron testigos el Mayordomo Bernardino Rodríguez, el Procurador General Nicolás de Echeverría y Lerchundi, el General José Ruiz de Arellano, y los Regidores Matías Solana y Luis Navarro (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.1, Exp.3). Otros quince años después, en 1744, son empadronados en la misma Chacra, ahora perteneciente a Juan Antonio de Arozarena y Armaza, sobrino carnal de Juan de Armaza y Arregui, designado en 1767 Alcalde de Hermandad de los pagos de Magdalena y Matanza. veintidos (22) varones y diecinueve (19) hembras mayores de 18 años, que portaban los apellidos Arregui, Almanza y Gutiérrez, y 38 menores entre varones y hembras, totalizando 79 almas (Documentos para la Historia Argentina, 1955, X, 258). Lamentablemente, en los padrones posteriores practicados en el lugar no han quedado rastros de esta población.

<sup>1167</sup> Acevedo, 1965, 81.

<sup>1168</sup> Poenitz, 1984a, 17; 1984b, 161-162; y 1994.

<sup>1169</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.34, Exp.17.

<sup>1170</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.217, Exp.9, fs.29-45.

<sup>1171</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.82, Exp.16; y Leg.175, Exp.8, fs.46-47v., y 81-84; e Intendencia de Salta-Santiago del Estero, 1734-1810, Sala IX, 5-7-7.

<sup>1172</sup> AGN, División Colonia, Justicia-Real Cárcel, 1761-1807 [Sala IX, 26-7-12].

<sup>1173</sup> Lorandi, 1992, 158-159.

<sup>1174</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.254, Exp.5.

<sup>1175</sup> Torre Revello, 1946, 49; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.22, Exp.21.

<sup>1176</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.213, Exp.2.

<sup>1177</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.89. Hija del Maestre de Campo Francisco de Aguirre y Chavarría y de Bárbara Felipa Martínez de Iriarte y Ramírez de Baquedano, y mujer del Fiel Ejecutor Miguel de Indaburu e Iturralde (Zenarruza, 1991, 467). Habitaban los Pueblos de Yuracares en la Cordillera de los Nuevos Yungas, inmediata al Pueblo de Totora (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.28, Exp.830).

<sup>1178</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.80-91v.

<sup>1179</sup> ver Saeger, 1985.

<sup>1180</sup> Figueroa, 1924; y Farberman, 1992.

<sup>1181</sup> contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, por mal

---

trato a los Indios (AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9).

<sup>1182</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.99, Exp.11, fs.11-12.

<sup>1183</sup> Asimismo encomendero de Mopa, Santiago del Estero.

<sup>1184</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.92-94; y 181-189. Juan Gregorio era marido de María Inès de Agüero y cuñado del Maestro Casimiro de Agüero.

<sup>1185</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.

<sup>1186</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.182.

<sup>1187</sup> Bustos Argañaráz, 1987, 175-202.

<sup>1188</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5.

<sup>1189</sup> ver Beltramini, 1978.

<sup>1190</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. Una de las indias de estos Pueblos fué la madre del poeta revolucionario y prócer de la independencia Cubana José Antonio Miralla.

<sup>1191</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.33, Exp.1195.

<sup>1192</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, citado por Ferreyra Videla, 1940, 1943 y 1946.

<sup>1193</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.14v.

<sup>1194</sup> *Ibíd.*

<sup>1195</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.278.

<sup>1196</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.142, Exp.34.

<sup>1197</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.136.

<sup>1198</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.277. Para la historia de Cayastá, ver Bruno, 1993, 214-215.

<sup>1199</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.8, Exp.4; y Tribunales, Leg.225, Exp.22, fs.1-2.

<sup>1200</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.46, Exp.14.

<sup>1201</sup> hijo de Lorenzo Gordaliza y de Isabel de Hoyos, sobrino de Jose de Uriburu, y cuñado del Encomendero de los Molinos Félix Ventura de Isasmendi (Cornejo, 1937, 579 y 619; y Calvo, II, 32-33).

- 
- <sup>1202</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.63.
- <sup>1203</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.3 (sin foliar).
- <sup>1204</sup> ver Pinto Rodríguez, 1993, 679-680.
- <sup>1205</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.60v.
- <sup>1206</sup> Idem.
- <sup>1207</sup> Ferrer de Arréllaga, 1985, 109; Susnik, 1990-91; y Santamaría, 1992, 144-145.
- <sup>1208</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15.
- <sup>1209</sup> AGN, Interior, Leg.40, Exp.3, fs.101.
- <sup>1210</sup> hijo de Francisco Pacheco y Cevallos y de Joaquina Camacho Narvona, y por consiguiente nieto del fundador de la estancia de la Hermandad de la Caridad (Morquio Blanco, 1990, 134); marido de Dionisia Obes; y consuegro de Benito Chain.
- <sup>1211</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.
- <sup>1212</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.
- <sup>1213</sup> Ver Saguier (1989) y (1991).
- <sup>1214</sup> Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, División Colonia, Hacienda, Legajo 110, Expediente 2825, fs. 38v.
- <sup>1215</sup> Buechler, 1973, 51 y Tandeter, 1980, 310
- <sup>1216</sup> Las diez Visitas estudiadas son las correspondientes a los meses y años siguientes:  
\_\_\_\_ I-III 1778 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1)  
\_\_\_\_ VIII 1780 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 131, Exp. 17)  
\_\_\_\_ VIII 1781 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp.486)  
\_\_\_\_ IX-XI 1783 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 23)  
\_\_\_\_ VIII 1784 (AGN, Sala IX, Interior, Leg. 18, Exp. 25)  
\_\_\_\_ X-XII 1786 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37 Exp.965)  
\_\_\_\_ XI 1787 (AGN, Sala IX, Interior, Leg. 23, Exp. 8)  
\_\_\_\_ III 1792 (AGN, Sala IX, Potosí, 1792 Leg. 11, 6-4-1)  
\_\_\_\_ V 1793 (AGN, Biblioteca Nacional, Documento 4570)  
\_\_\_\_ 1802 (AGN, Sala IX, Potosí, 1802 Leg. 15 6-4-5)
- Debo la información correspondiente a varias de estas Visitas a la generosidad del Dr. Daniel Santamaría.
- <sup>1217</sup> Cañete, 1952, 609
- <sup>1218</sup> AGN, Biblioteca Nacional, Documento 4570, fs. 4 y 16v.
- <sup>1219</sup> Idem, fs. 4
- <sup>1220</sup> AGN, Sala IX, División Colonia, Hacienda, Legajo 34, expediente 882, acápite 21
- <sup>1221</sup> Martiré, 1973, 135.
- <sup>1222</sup> Idem, 290

---

<sup>1223</sup> Tandeter, 1984, 32

<sup>1224</sup> En México, los barreteros alcanzaban un jornal de diez reales diarios (Brading, 1975, 386). En Chile, un barretero hacía la excavación, siendo sus instrumentos "...una barreta de fierro acerada por ambas puntas, a lo largo de poco más o menos una vara; de esta se vale si no halla resistencia, pero si la dureza del metal o de otro cuerpo intermedio imposibilita el golpe de aquel instrumento, se vale de la cuña o slocana (sic). La primera es un clavo asentado en la cabeza y en el extremo, que termina en punta y su extensión es una cuarta. La segunda es semejante, aunque de más extensión...el cual instrumento apoya el barretero al golpe de un martillo del peso de 25 libras que se le da el nombre de combo. Más si la dureza es tanto...el operario se vale de otro instrumento que se nombra barrena, que es un clavo aguzado en la cabeza...con éste abre un conducto semejante al cañón de una pistola, lo ocupa con pólvora en más o menos cantidad...antes de cerrar aquel conducto se pone una mecha que toca la pólvora...esto facilitará la quiebra del metal" (Salazar, 1985, 193).

<sup>1225</sup> tenateros en México.

<sup>1226</sup> En México, a los tenateros, equivalente de apiri, se le pagaba a razón de ocho reales cada día (Brading, 1975, 386).

<sup>1227</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp. 486.

<sup>1228</sup> Martiré, 1973, 217.

<sup>1229</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 59, Exp. 1512, Doc. n.4.

<sup>1230</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 126, Exp. 3200, N.5, fs. 6

<sup>1231</sup> Cortés Salinas, 1970, 170.

<sup>1232</sup> En México, los tenateros cargaban entre 150 y 330 libras en cada bota (Brading, 1975, 185 y 384; y Martiré, 1973, 219).

<sup>1233</sup> Tandeter, 1980, 255 y 256.

<sup>1234</sup> Martiré, 1973, 227.

<sup>1235</sup> Idem, 226

<sup>1236</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 59, Exp. 1512, Doc. N.4.

<sup>1237</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 59, Exp. 1512, Doc. N.4

<sup>1238</sup> Fisher, 1977, 43.

<sup>1239</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 126, Exp. 3200, N. 5, año 1805, fs. 6

<sup>1240</sup> Martiré, 1973, 143, 271, y 65.

<sup>1241</sup> Lo que cargaban tres llamas (6 costales o 24 arrobas) podía cargar una sola mula (Manrique, 1987, 61).

<sup>1242</sup> Llanos, 1983, 32; y Tandeter, 1980, 395.

<sup>1243</sup> Bakewell, 1977, 189.

<sup>1244</sup> AGN, División Colonia, Expedientes 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs. 93v.

<sup>1245</sup> AGN, Sala IX, Expedientes 1776-1806, fs. 93v.

<sup>1246</sup> Cañete, 1952, 658.

---

<sup>1247</sup> Eduardo R. Saguier (1989): "La Penuria de Agua, Azogue, y Mano de Obra en los Orígenes de la Crisis Minera Colonial. El Caso del Potosí a fines del Siglo XVIII", *HISLA, Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social* (Lima, Perú), n.12, 2o semestre de 1989, 69-81.

<sup>1248</sup> Juan del Pino Manrique, "Descripción de la Villa de Potosí y de los partidos sujetos a su intendencia", en *Colección Pedro de Angelis*, II, 1836, Buenos Aires.

<sup>1249</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 949

<sup>1250</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 14.

<sup>1251</sup> AGN, Sala IX, Leg. 21, Exp. 486

<sup>1252</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 135, Exp. 3389

<sup>1253</sup> Mitre, 1981, 115.

<sup>1254</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 252, Exp. 8.

<sup>1255</sup> AGN, Sala XIII, Potosí, Leg. 75, Libro 3, fs. 226v.; y Buechler, 1977, 108.

<sup>1256</sup> AGN, Sala XIII, Potosí, Leg. 73, Libro 3, fs. 218v

<sup>1257</sup> AGN, Sala XIII, Potosí, Leg. 75, Libro 3, fs. 239

<sup>1258</sup> Villalobos, 1979, 67-95, citado por Hidalgo, 1987, 197.

<sup>1259</sup> "...como lo acredita el progreso y naturaleza de la causa que se ha seguido por espacio de más de cuatro años sobre la sugeta materia, en la que ha molestado a todos los Mineros e interesados que se mantienen en la parte superior a toda la veta comida que se lleva expresada, pretendiendo obligarlos a una exacción indebida". (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 230)

<sup>1260</sup> Idem

<sup>1261</sup> Idem

<sup>1262</sup> Idem

<sup>1263</sup> Idem

<sup>1264</sup> Idem

<sup>1265</sup> Idem.

<sup>1266</sup> Idem

<sup>1267</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 39.

<sup>1268</sup> Idem, fs. 36

<sup>1269</sup> Cortés Salinas, 1970, 168

<sup>1270</sup> Cole, 1985, 134.

<sup>1271</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 123.

<sup>1272</sup> Juan del Pino Manrique, "Descripción de la Villa de Potosí y de los partidos sujetos a su intendencia", en *Colección Pedro de Angelis*, II, 1836, Buenos Aires.

---

<sup>1273</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 59, Exp. 1512, Doc. N.4.

<sup>1274</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 126, Exp. 3200, N. 5, año 1805, fs. 6

<sup>1275</sup> Como fue el caso de José Quesada y Roa, natural de Moquegua, hijo del Capitán Juan José de Quesada y Vélez de Córdoba y de Filotea de Roa y Carvajal; marido de Rosa López de Lisperguer y Nieto, hija del Dr. José López Lisperguer, Oidor de la Real Audiencia de Charcas, y de Ana Nieto y Quintana (comunicación personal de Juan Isidro Quesada); y arrendatario del Ingenio de San Diego, propiedad del Conde de Casa Real de Moneda (Ver Visita de 1793). En otras palabras era el azoguero Quesada con cuñado del propietario del ingenio Conde de Casa Real de Moneda. En 1794 Quesada solicitó licencia para construir un ingenio en sus haciendas de Chari Chari, Provincia de Potosí (AGN, Tribunales, Leg.124, Exp.26).

<sup>1276</sup> Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2).

<sup>1277</sup> Concertó con Pedro Lea, Francisco Alvarez Campana, Juan de Vargas Macías, Domingo Basabilbaso, Domingo Ybarra (AGN, Protocolos, Reg.2, 1745, fs.218v., y 217v.; R.4, 1752, fs.138v., y 130; R.1, 1752, fs.183; R.2, 1752, fs.235 y 255v., 261, 315v., 301v., y 297).

<sup>1278</sup> Se endeudó con Francisco Alvarez Campana, María Josefa Balbastro, y Nicolás Acha (AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, fs.439; R.2, 1764, fs.213v.; y R.6, 1766, fs.65v.).

<sup>1279</sup> Se endeudó con Francisco Antonio de Escalada, Pedro Gurruchaga, y Vicente Azcuénaga (AGN, Protocolos, Reg.5, 1775, fs.160v.; R.2, 1778, fs.42v.; y R.2, 1778, fs.41).

<sup>1280</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1780, fs.116; y R.1, 1787, fs.141v.

<sup>1281</sup> Se endeudó con Ignacio Maraño y Artegavertia, Sol, Montells y Cia, Francisco Ignacio de Ugarte, José de Ugarteche, A. Rodríguez, y J. Capriles (AGN, Reg.1, 1786, fs.134v.; R.3, 1786, fs.128; R.6, 1786, fs.247 y 269v.; R.2, 1789, fs.317; y R.3, 1803, fs.146).

<sup>1282</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1753, fs.208v.

<sup>1283</sup> AGN, Protocolos, Registro 2, 1744, fs.513 y 508; Reg.1, 1752, fs.524 y 560; Reg.1, 1753, fs.600v.; Reg.2, 1753, fs.476, 560v., 565v., y 564.

<sup>1284</sup> AGN, Hacienda, Leg.12, Exp.230.

<sup>1285</sup> Buechler, 1973.

<sup>1286</sup> Buechler, 1973, 51 y Tandeter, 1980, 310

<sup>1287</sup> Las diez Visitas estudiadas son las correspondientes a los meses y años siguientes:  
\_\_\_\_\_ I-III 1778 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1) \_\_\_\_\_ VIII 1780 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 131, Exp. 17) \_\_\_\_\_ VIII 1781 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp.486)  
\_\_\_\_\_ IX-XI 1783 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 23)  
\_\_\_\_\_ VIII 1784 (AGN, Sala IX, Interior, Leg. 18, Exp. 25)  
\_\_\_\_\_ X-XII 1786 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37 Exp.965) \_\_\_\_\_ XI 1787 (AGN, Sala IX, Interior, Leg. 23, Exp. 8)  
\_\_\_\_\_ III 1792 (AGN, Sala IX, Potosí, 1792 Leg. 11, 6-4-1)  
\_\_\_\_\_ V 1793 (AGN, Biblioteca Nacional, Documento 4570)  
\_\_\_\_\_ 1802 (AGN, Sala IX, Potosí, 1802 Leg. 15 6-4-5)  
Debo la información correspondiente a varias de estas Visitas a la generosidad del Dr. Daniel Santamaría.

<sup>1288</sup> AGN, Biblioteca Nacional, Documento 4570, fs. 4 y 16v.

<sup>1289</sup> Idem, fs. 16v.

---

<sup>1290</sup> Una minuciosa búsqueda en el Archivo Nacional de Sucre, de seguro descubriría una multitud de casos semejantes que podrían poner en tela de juicio la credibilidad del contenido de estas Visitas.

<sup>1291</sup> Tandeter, 1980, 395.

<sup>1292</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 135, Exp. 3389.

<sup>1293</sup> Platt, 1987, 521.

<sup>1294</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 123.

<sup>1295</sup> Arzans, 1965, I, 169; y Tandeter, 1980, 264.

<sup>1296</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 87, Exp. 2263, fs. 7v.

<sup>1297</sup> En México, por el contrariok, existieron grandes establecimientos fortificados, que podían llegar a tener 70 arrastres y 10 molinos de pisones, como en el caso de José de la Borda, u 84 arrastres y 14 fraguas, como en el caso de la hacienda de la familia Fagoaga, en Sombrerete (Brading, 1975, 193).

<sup>1298</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 31v.

<sup>1299</sup> Cañete, 1952, 201, 276.

<sup>1300</sup> Cortés, 1970, 170, acápite 187.

<sup>1301</sup> Por peara se entendía en la época colonial diez unidades del objeto mensurado. Era una medida usada en las arrias de mulas.

<sup>1302</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 23, Exp. 8, y Hacienda, Leg. 21, Exp.486., y Leg.37, Exp. 965.

<sup>1303</sup> Tandeter, 1980, 116

<sup>1304</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp. 486.

<sup>1305</sup> Código Carolino, Libro 2, Título VIII, Ord. VI.

<sup>1306</sup> Saguier, 1989.

<sup>1307</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 47

<sup>1308</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 23, Exp. 8.

<sup>1309</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp.965.

<sup>1310</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 23, Exp.8.

<sup>1311</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 18, Exp. 25.

<sup>1312</sup> Bakewell, 1984, 149.

<sup>1313</sup> Cole, 1985, 25.

<sup>1314</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp. 486.

<sup>1315</sup> Martiré, 1973, 113.

<sup>1316</sup> AGN, Sala IX, Leg.37, Exp. 965.

---

<sup>1317</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp.1, fs. 36v. Este último tipo de castigo, al ser prohibido, fue sustituido por otros. En la Visita de 1793, se menciona que los Alcaldes Cañaris "...tendrán cuidado de tener allí dos carneros de la tierra, para castigar montados en ellos a los indios que se conviniere no haber cumplido con su obligación".

<sup>1318</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 58.

<sup>1319</sup> Por embarrar las piñas se entendía recubrir con ceniza los hornos de revérbero dedicados a la copelación, última fase del procedimiento de beneficio. La ceniza extendida sobre el horno absorbía el plomo de la aleación oxidada, y entonces la plata era recogida del fondo del horno en unos pequeños recipientes porosos y de baja profundidad que se llamaban copelas. (Hadley, 1979, 156). Cualquier ceniza era buena si estaba limpia de tierra, pajas, o carboncillos, pero la mejor de todas era la de huesos quemados por ser sequisima. También era muy buena la de molle o de otro cualquier árbol o matorral que estuviere todo el año verde [como la quinua] (Alonso-Barba, 1967, 167).

<sup>1320</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 87, Exp. 2263

<sup>1321</sup> El record de producción lo obtuvo Juan de Peñarrubia pues, poseyendo las cuatro labores de Ortiz, Muñiza, Rosario, y Flamencos, producía un promedio de 170 aylos de metal semanales, que beneficiaba en la década de 1780 en sus tres ingenios de Chaupi, San Miguel, y Chaca, a un promedio de 120 cajones semanales. En la misma época, le seguía en orden de méritos Juan Antonio Fernández Dorado, quien poseyendo las cuatro labores de Guebara, Chinchilla, Carmen Chico y Nuestra Señora de la Asunta producía un promedio de 135 aylos de metal semanales, que beneficiaba en sus tres ingenios de Agua de Castilla, Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción y Barraganes a un promedio de 70 cajones semanales.

<sup>1322</sup> Los buitrones tenían 40 pies de largo, 10 pies de ancho, y 6 o 7 pies de alto, desde su planta y bóvedas.

<sup>1323</sup> Alonso-Barba, 1967, 86.

<sup>1324</sup> Bargalló, 1955, 181.

<sup>1325</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 866v.

<sup>1326</sup> "En Aullagas, los metales se distinguen con el nombre de brosas, piritas, chamuscos, rayadillos, y llampus. Los primeros rinden 50 hasta 25 marcos por cajón, los segundos 80 a 100 marcos, los terceros, 300 marcos, los de la cuarta especie 15 a 20 marcos, y los últimos de 8 a 10 marcos, de manera que labrándose de esta última ley, quebraría forzosamente el minero, si no tuviere mita y el ingenio se hallare muy distante" (Cañete, 1952, 244).

<sup>1327</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 23, Exp.8; y Leg. 37, Exp.965.

<sup>1328</sup> Cañete, 1952, 67.

<sup>1329</sup> Según nos refiere Cañete, el primero en beneficiar los relaves de los trapiches fué Lorenzo Bravo de Bobadilla, dueño de los Ingenios Jesús María y San Lorenzo de Alantana, en la década de 1750 (Cañete, 1952, 67).

<sup>1330</sup> Cañete, 1952, 67.

<sup>1331</sup> Cada terno de caperuza costaba alrededor de cuatro pesos (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 87, Exp. 2263, fs. 8v.).

<sup>1332</sup> Alonso-Barba, 1967, 112.

<sup>1333</sup> En el Bajo Perú la media era de 12 marcos y en México de 15 marcos por cajón (Brading, 1975, 152).

- 
- <sup>1334</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp.965.
- <sup>1335</sup> Greve, 1943, 184.
- <sup>1336</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 1107v.
- <sup>1337</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1018, fs.30.
- <sup>1338</sup> Ver Galmarini, 1980.
- <sup>1339</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 207, Exp. 3, fs. 67.
- <sup>1340</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.207, Exp.2, fs. 46v.
- <sup>1341</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 35v.
- <sup>1342</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 61.
- <sup>1343</sup> Idem.
- <sup>1344</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 35v.
- <sup>1345</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 1119.
- <sup>1346</sup> Cañete, 1952, 70-71.
- <sup>1347</sup> Lamentablemente, por carecer de los libros manuales de lavas correspondientes a los ingenios aquí estudiados desconocemos la producción final semanal en marcos de plata, así como la pérdida exacta del azogue consiguiente. De todas maneras, el cálculo del azogue perdido semanalmente en cada ingenio lo practicamos multiplicando el número de cajones de metal refinado (columna XIII de Tabla I) por la ley del metal incorporado (columna VI de Tabla III) denunciado en las Visitas, para luego volver a multiplicarlo por las 14 onzas de azogue perdido por cajón.
- <sup>1348</sup> Bargalló, 1955, 186.
- <sup>1349</sup> Alonso-Barba, 1967, 140.
- <sup>1350</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 233, Exp. 20.
- <sup>1351</sup> Vicuña Mackenna, 1882, 68.
- <sup>1352</sup> Marilúz Urquijo, 1987, 191.
- <sup>1353</sup> Cañete, 1952, 244.
- <sup>1354</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442, fs. 194.
- <sup>1355</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 855v.
- <sup>1356</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 18, Exp.25.
- <sup>1357</sup> Tandeter, 1980, Tabla 22, 265.
- <sup>1358</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 867.
- <sup>1359</sup> Assadourian, 1983, 254. En México, por ser su mineral más rico, la proporción de sal consumida era menor a la consumida en Potosí, alcanzando entre 2,5 y 5 libras cada quintal de metal según Brading y de 2,5

---

a 3 libras según Bakewell (Brading, 1975, 191; y Bakewell, 1977, 196).

<sup>1360</sup> Platt, 1987, 506 y 540.

<sup>1361</sup> Bargalló, 1955, 181.

<sup>1362</sup> Tandeter, 1980, 265.

<sup>1363</sup> Llanos, 1983, 38.

<sup>1364</sup> Cañete, 1952, 66. El estaño facilitaba que "...corra el caldo del compuesto, o reunión de los demás metales liquidados por el fuego. Se hallaba en Oruro de distintas calidades. El que se extrae de las minas de los Cerros de esta Villa, es de las caveseras de las Vetas de plata; pues generalmente hacen estaño en su superficie y en la profundidad suceden las tierras de donde se explota aquel más noble, e incomparable metal. Hay otro estaño que se saca de los relaves, o sean tierras y lamas que quedan en los Ingenios, después que por medio del azogue se les ha sacado la plata que contenían y hay otro que se produce por sí sólo sin acompañado alguno de otros metales, quales el que rinden las antiguas y pingües minas de Guanuni. El Estaño que se extrae de las primeras tierras de las minas de Plata, parece tiene menos acompañados de antimonios, y semimetales, que el que se beneficia de los relaves; pero unos y otros se fabrican en esta Villa. Las de Estaño del Zerro de ella, y de relaves, con el uso se rajan; y las del de Guanuni se doblan: aquel cobra un color mas terso y blanco, y esta cobra el aplomado y obscuro, pero sin rajarse, astillar, ni hacer ojas. Quieren decir que lo agrio del Estaño de Oruro dimana de hallarse tocado con plata, bronce y arsénico, y que por estarlo el de Guanuni con plomo es más dulce y doblegable. Por esta diferencia de calidades y por no estar investigada hasta el día la causa que la produce, el concepto público ha dado más estimación al Estaño de Guanuni, que al de Oruro: pero sin un resultado práctico de qual sea mejor para el fin que influye al acopio de este metal por cuenta de la Real Hacienda (Potosí, 13-XI-1804 [AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.121, Exp.3061]).

<sup>1365</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 854v.

<sup>1366</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 855v.

<sup>1367</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082

<sup>1368</sup> Idem.

<sup>1369</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 123.

<sup>1370</sup> Salazar, 1985, 178.

<sup>1371</sup> Las boyas en el Bajo Perú tenían otro significado, pues aludían a los pozos con alta producción (Manrique, 1987, 58).

<sup>1372</sup> Mitre, 1981, 122.

<sup>1373</sup> En yacimientos mineros carentes de agua, como fué el caso de Guanajuato en México, el mineral era morterado a sangre, merced a la fuerza propulsada por las mulas.

<sup>1374</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 15

<sup>1375</sup> Los quimbaletes son, a juzgar por Cañete, "...dos piedras grandes, la una chata que se llama solera, y otra ovalada que por medio de una manija de madera se mueve sobre la primera, haciendo los oficios de Almirez. Es tan poco lo que rinde esta máquina, que el mejor operario apenas dá la tarea de dos quintales al día, que a la semana corresponde a doce, que comparándose el cajón de 50 quintales es menester un mes entero para moler un cajón de metal en cada quimbaleta, con el costo de dos reales por quintal, que son \$ 12 1/2 en el cajón. Por lo que ninguno emprende este género de trabajo, sino es con metales de muy subida ley, que después de recompensar los costos, las demoras del tiempo, y las molestias, pueda dejar alguna ganancia regular". (AGN, División Colonia, Expedientes 1776-1806, Sala IX, 9-3-1).

- 
- <sup>1376</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 15.
- <sup>1377</sup> AGN, División Colonia, Expedientes 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs. 151.
- <sup>1378</sup> AGN, División Colonia, Expedientes 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs. 151.
- <sup>1379</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 15v.
- <sup>1380</sup> cangalleros en Chile.
- <sup>1381</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 15v.. Ver asimismo Vicuña McKenna, 1882, 228.
- <sup>1382</sup> Idem
- <sup>1383</sup> AGN, División Colonia, Expedientes 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs. 93v.
- <sup>1384</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 21, Exp. 486.
- <sup>1385</sup> Idem.
- <sup>1386</sup> Buechler, 1977, 83.
- <sup>1387</sup> Aranzaes (1915) nos informa que en 1780 el Partido de Yungas tenía 308 fincas, que producían 200 mil cestos de coca anuales, con un precio de dos millones de pesos plata (Aranzaes, 1915, 623).
- <sup>1388</sup> Buechler, 1977, 83.
- <sup>1389</sup> Larson, 1988, 77.
- <sup>1390</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 18, Exp. 25.
- <sup>1391</sup> Idem.
- <sup>1392</sup> Idem.
- <sup>1393</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 122, Exp. 3082, fs. 862v.
- <sup>1394</sup> Idem.
- <sup>1395</sup> Idem.
- <sup>1396</sup> Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el suegro del Brigadier General Don Sebastián de Seguro (Aranzaes, 1915).
- <sup>1397</sup> Buechler, 1977, 109.
- <sup>1398</sup> Bakewell, 1984, 163.
- <sup>1399</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 190, Exp. 14.
- <sup>1400</sup> Idem
- <sup>1401</sup> Idem
- <sup>1402</sup> Idem

---

<sup>1403</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 39, Exp. 3, fs.17.

<sup>1404</sup> Idem.

<sup>1405</sup> Idem.

<sup>1406</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 124, Exp. 39, fs. 2.

<sup>1407</sup> Sánchez Albornoz, 1978, 59.

<sup>1408</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 126, Exp. 3186.

<sup>1409</sup> Idem.

<sup>1410</sup> Idem.

<sup>1411</sup> AGN, División Colonia, Expedientes-Autos-Sumarios, 1751-1809, Sala IX, 23-1-7.

<sup>1412</sup> Idem.

<sup>1413</sup> Idem.

<sup>1414</sup> Idem.

<sup>1415</sup> Manuel Montenegro al Juez Subdelegado Pedro Cossio, Laxa, 22-X-1804 (AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 15, Exp. 466, fs. 44).

<sup>1416</sup> AGN, División Colonia, Expedientes-Autos-Sumarios, 1751-1809, Sala IX, 23-1-7.

<sup>1417</sup> Studer, 1958. Por motivos que ignoro Tandeter (1991) me atribuye haber concluído que esta epidemia fué producto de la peste bubónica cuando en la realidad yo sólo la había enunciado a título de presunción (Tandeter, 1991, 65, nota 115).

<sup>1418</sup> Sánchez Albornoz, 1978, 164.

<sup>1419</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 15v.

<sup>1420</sup> Idem

<sup>1421</sup> Sobre el monopolio estatal del mercurio en Nueva España, ver Dobado González, 2002.

<sup>1422</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 36v., acápite 71.

<sup>1423</sup> Buechler, 1977, 100.

<sup>1424</sup> Idem.

<sup>1425</sup> Idem, fs. 37, acápite 75.

<sup>1426</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 232, fs. 29v.

<sup>1427</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 54, Exp. 10

<sup>1428</sup> Don Manuel Belzú, vecino y trapichero de Poopó, estuvo comprando desde 1785 "...por mano de algunos sus confidentes en la Villa de Oruro varias partidas de azogue de 100 y 200 libras de casa de los expresados Don Francisco Sorsano y Don Manuel Cosio, a razón de 120 y de 125 pesos el quintal. Don Mateo Luna, vecino y trapichero en Poopó, compró en 1785 en el mismo Poopó del cacique de Challacollo Don Melchor Challapa cien libras de azogue al precio de doce reales "...lo mismo a que lo recibió el referido

---

cacique en el mineral de Aullagas en cuenta de una dependencia que se le estaba debiendo, y en otra ocasión ha comprado en este pueblo el espresado Luna cien libras al precio de once reales de Don Pedro Jaen". Tomás de Rivera, vecino y trapichero de Poopó, compró a fines de 1784 en Oruro 50 libras de azogue a diez reales cada una, de casa y poder de Don Francisco Sorsano, y en 1785 en dicha Villa, de Don Basilio de Andrade cien libras a ocho reales, "...y también tomó otras pequeñas partidas del expresado azogue a sus propios compañeros que se las habían franqueado al costo que les tenía de 9, 10, y 11 reales libra". Tomás Tupa, indio originario y trapichero de Poopó, compró en 1785 del mismo Basilio Andrade en la Villa de Oruro 200 libras al precio de 8 reales, "y consiguientemente poco tiempo después de casa y poder de Don Francisco Sorsano 50 libras al referido precio de ocho reales". En conclusión, Bernardo Antonio del Riego manifiesta que "...me resta decir que por encargo que tuve habrá el espacio de un año, de Don Diego Antonio del Portillo, sobrino de Don Francisco Sorsano, presencié el peso que a punto fijo no tengo presente de 800 o 900 libras de azogue que por el referido Don Diego o su tío Don Francisco se compraron en este pueblo [Poopó] de Don Juan Bautista Lariz, y se condujeron a la Villa de Oruro por dichos señores inmediatamente lo que no he querido omitir en satisfacción del superior precepto de V.S. y verdadero descargo de mi conciencia". (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 35, Exp. 903)

<sup>1429</sup> Juan Andrés Gelly, era natural de Asunción, hijo de Juan Gelly y de María del Carmen Martínez de Ibarra y Quiñones (Ramos, 1972, 1).

<sup>1430</sup> En respuesta al interrogatorio Pedro Xavier, indio ladino, residente en el Ingenio de Churicala, manifiesta "...no saber otra cosa que Don Juan Gelly ...envió con el declarante tres veces en badanas azogue a este Asiento a entregar a Don Tomás García que lo efectuó, y que una vez lo envió en una limeta dentro de una canasta a entregar a la Genobesa y que las tres veces que le entregó en badanas lo hizo de noche y a ocultas". A continuación, Bitoriano Raya, español vecino del Asiento de Ocuri en Aullagas, dijo que "...no sabe otra cosa que Don Juan Gelly al ir de Churicala (Aullagas) para Chuquisaca, vendió a su mujer estando ausente el declarante 28 1/2 libras de azogue en mala medida por 42 libras que este le llevó de dicho Ingenio" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442).

<sup>1431</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559

<sup>1432</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559

<sup>1433</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559

<sup>1434</sup> Idem. La subvaluación de los aforos en los libros de alcabalas que los Receptores habrían generalizado invalidarían en consecuencia la credibilidad de esta fuente documental, para estimar el volumen y la intensidad del mercado interno colonial.

<sup>1435</sup> AGN, SALA IX, Hacienda, Leg. 11, Exp. 213. "El origen que tuvo la medida de la botija de aguardiente de dichos tambos fué que por una mujer mestiza llamada Juana, que por apodo le decían 'la pagadora', tuvo la industria y cavilación de que tenía su pulpería inmediata a los tambos de viñateros, a quien por cada medida de aguardiente y vino le daban medio real de cuia grangería fué gozando sin que nadie advirtiese en ponerle embarazo en la inventiva de dicha medida hasta que por su muerte dejó por su albacea a un abogado que hubo en ésta nombrado José Aguirre quien también dentró alquilando la dicha media botija de medida como lo hacía su instituyente. Y habiendo llegado a saber de esta invención un Don Fausto de Aldunate, Alférez Real y Procurador General,...hizo con sus instancias que las dichas medidas de botija y aquel medio real que daban los compradores por cada medida se aplicase a los Propios desta [ciudad] como en efecto se aplicó, y desde entonces se arrendaba ya juntamente con los ramos de la Sisa de aguardiente y mojón de vino". (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 226, Exp. 7, fs. 40) Las mulas cargaban solamente dos botijas, siendo la capacidad de carga de la mula de dos quintales (Contreras, 1982, 87).

<sup>1436</sup> Con la Sublevación el precio de la coca llegó a las nubes, al extremo que "...algunos Indios suelen en lugar de la coca tomar la Auchicoca, que es una simiente con que se alimenta una Ave de este nombre, que pasándose a las Montañas la depone, y de que nace otra semilla que llaman Chunchicoca, que en su idioma significa coca tierna. La Koa o Poleo es otra especie que en la reciente sublevación han usado los Indios de la Puna a falta de su yerba principal, masticándola y acullicando con ella como es constante" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg. 13, Exp. 299). En cuanto a los Indios del Oriente Alto peruano, "...mascan también la hoja de un Arbol que llaman Betel, y lo que es digno de reflexión mezclándola como estos con cierta masa de polvos de cal, pero ellos no creen que les inspira vigor, y solamente la usan porque reconocen que les da buen

---

aliento y preserva su dentadura. Si el Betel fortifica el estómago, como lo asegura el autor del Diccionario de la hystoria natural Mr. Valmont de Bomare, será porque lo usan siempre acompañado de los granos de cardamomo, u fruta del Paraíso, del Cachou que es una especie de goma de la Palma llamada Arec, del Caté o licium indicum, y del clavo, frutos nobles y aromáticos: estos pobres indios no acompañan su coca, sino de su llipta, que viene a ser nada mas que un compuesto de algunas sales, o cal incorporadas en cierta masa de algún vegetal: así su calidad no debe ser nutritiva y eficaz, ni probables los cuentos de sus virtudes" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.300).

<sup>1437</sup> Santamaría, 1987, 433.

<sup>1438</sup> Aparentemente el mismo catalán que pretendió edificar un puente sobre el río Tunuyán, Mendoza.

<sup>1439</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 57, Exp. 1452

<sup>1440</sup> Idem.

<sup>1441</sup> Idem.

<sup>1442</sup> En la opinión de José Agustín de Arce, Defensor Fiscal y Protector de Naturales de la Intendencia de Potosí, pende la coca "...aún después de cogida de 200 accidentes..., ya experimentando de que se les pudra no habiendo sol, como sucede frecuentemente en aquellos parajes, por falta de fleteros que la estraigan inmediatamente, o por el descuido de estos en el camino, dejándola mojar o perder. Ni pueden compararse con los hacendados o cosecheros de otras provincias, porque por ejemplo un viñatero, sabe que su viña sobre poco más o menos le ha de producir tal o tal suma de dinero, sin temor de que los varios accidentes a que le sugete la suerte hayan regularmente de destruirle en el todo. La viña queda en pie y si el año le sale malo, otro le subsanará las quiebras. Al contrario un hacendado de Yungas, que coge regularmente 500 cestos de mita (coca), se halla de repente con diez cestos, por causas que a más de esto, le dejen el cocal destruido. Una cosecha que se anticipe, un beneficio que se retarde, los hielos, la nimia sequedad, las muchas aguas, o escasez de ellas, y otras varias enfermedades como epidemias que tiene esta prodigiosa planta, cual es por ejemplo la vena negra que se derrama y se extiende por todo el corazón de ella son causas manifiestas de la ruina de un cocal, y también del cocalero o hacendado, y por ello debe numerarse la coca entre los frutos que el derecho llama industriales, o cuasi industriales, como que por tales se han mirado en la Real Audiencia del distrito". (AGN, División Colonia, Expedientes 1800-09, Sala IX, 9-4-5, expedientillo n. 99, fs. 3)

<sup>1443</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 11, Exp. 213.

<sup>1444</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 9, Exp. 153, fs. 5

<sup>1445</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 226, Exp. 7, fs. 22. "...al que no paga este medio real le quitan su montera, y la lliclla [medida] a la india que va a comprar lo que a visto con sus ojos en el tambo...Y si el vendedor o comprador quiere pesar en su romana no por esto a de dejar de pagar el comprador el real impuesto de cada odre...muchas de las pobres mujeres por su miseria y cortedad compran al fiado aquel cucho o medio cucho que sacan, más el medio real de la medida lo pagan de pronto muchas mujeres pobres por ganar un medio real para el pan del día se bandean comprando un cucho y medio cucho en la bandeja de sus pulperías".(Idem, fs. 27)

<sup>1446</sup> Acerca de la producción de aguardiente en San Juan, ver Garavaglia, 1987, 58. El estado floreciente que prometía la ciudad de San Juan, productora de vinos y aguardientes, "...pudo en otros tiempos lisonjear las esperanzas que hoy se miran frustradas; a costa de inmensas fatigas e incomodidades logran los vecinos de San Juan recoger el fruto de sus viñas, trabajar en sus beneficios, impendiendo crecidos caudales, la abundancia en aquel territorio disminuye la estimación y precio, se ven precisados a extraerlos fuera; este recurso les ocasiona otros considerables desembolsos en el alquiler de recuas, envase de los caldos, salarios de sirvientes para los transportes, y otros gastos imprescindibles, de aquí procede que las utilidades siempre son muy limitadas y que generalmente se experimente la ruina de los que se dedican a mantener este comercio, sobrellevando también el contrapeso de que los eclesiásticos en aquella ciudad y la de Mendoza, privilegiados de toda contribución vendan con más comodidad y a menor precio los frutos de sus rentas, capellanías y beneficios. Despues de esta suerte calamitosa llegaron a sentir los vecinos de San Juan tan extremadamente la contribución de los \$12 por cada carga que por libertarse de ella se resolvieron a hacer sus rutas por senderos extraviados atravesando asperezas, reduplicando los costos, y exponiendo sus vidas al

---

inminente riesgo de perderlas, experimentándose este trágico fin en repetidas ocasiones".(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1929)

<sup>1447</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

<sup>1448</sup> Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 369v.

<sup>1449</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

<sup>1450</sup> Idem

<sup>1451</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

<sup>1452</sup> En tiempos de Capoché vendían los indios cada costal de sal a medio real.

<sup>1453</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1

<sup>1454</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 47.

<sup>1455</sup> No todas las cenizas eran de igual calidad. La de mayor demanda era la procedente de quinua, por ser esta una planta perenne que abundaba en la región.

<sup>1456</sup> Bakewell, 1984, 89 y Salinas y Córdoba (1957).

<sup>1457</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 131, Exp. 3282, fs. 5-5v.

<sup>1458</sup> "...y asimismo no los obliguen [a los indios] a sacar nada de la pulpería, y por este respecto les hagan descuento que no se les abonará, y pagándoseles semanalmente en dinero efectivo no les den la mas mínima parte en estas especies ni menos exijan [los azogueros] del pulpero contribución alguna, por tener dentro del Ingenio la pulpería, como se está verificando, obligando a [los pulperos] que lo que por esta razón pagan lo resarzan de los indios con sus depravados fines" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 56v.).

<sup>1459</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 14, Exp. 13

<sup>1460</sup> Sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre o de la madre son muy similares.

<sup>1461</sup> Barbier, 1972, 418 y 434.

<sup>1462</sup> mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

<sup>1463</sup> banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San Carlos.

<sup>1464</sup> Eduardo R. Saguier (1991): "Las disputas en el seno de la burocracia estatal colonial. La facultad de nombrar y representar en el Virreinato del Plata (1739-1810)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

<sup>1465</sup> Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

<sup>1466</sup> Los regidores propietarios de los Cabildos diferían de una burocracia legal y racional en que carecían, al decir de Theobald (1982), de: a) esferas de competencia claramente definidas que estuvieran sujetas a reglas impersonales; b) un ordenamiento racional de relaciones de superioridad e inferioridad; c) un sistema regular

---

de designación y promociones; y d) salarios fijos pagados en metálico.

<sup>1467</sup> Cornejo (1971) nos relata que en Potosí "...se vió a uno de los Arias de Salta comprar por \$25.000 la vara perpetua de alcalde, y a Doña Tomasa Larrazábal y Avellaneda [nacida en Buenos Aires] comprar para su hijo Don Fermín Javier de Aoíz, la de Alguacil Mayor, cuyo costo de \$18.000, sumado con los gastos que originó la transacción, alcanzó a \$27.000" (Cornejo, 1971, 44). Correa Luna (1918) también nos relata que el comerciante Angel Alonso Gutiérrez había adquirido en Chuquisaca una regiduría perpetua con el producto de las ventas de las mercaderías que le había fiado Antonio José de Escalada (Correa Luna, 1918, 81). En Catamarca, Andrada de Bosch (1987) nos informa que el oficio de Regidor fué vendido en 1707 a Francisco Solano de Barros Sarmiento en \$310, y el Alferazgo Real a Francisco de Cubas Palacio en \$800 (Andrada de Bosch, 1987, 53-54). También las varas concejiles del Cabildo de Asunción del Paraguay se cotizaban en el mercado de los cargos públicos. Juan Francisco de Aguirre comentaba en 1793 que los regimientos llegaron a valer como 4.000 arrobas de yerba, o el equivalente a 6.000 pesos de plata de ocho reales (Aguirre, 1949-51, XVIII, 294-295, citado por Quevedo, 1973, 110).

<sup>1468</sup> Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). Contrajo matrimonio con una mujer, que según Indalecio González de Socasa, tenía "...bastantes conveniencias, y que sin embargo de ser como es notorio de dañado coito, tiene un espíritu el más lleno de vanidad que se ha podido escogitar, e intenta por este medio influyendo a su marido llegar a una clase de distinción de que...no era capaz,...No hace mucho tuvo esta mujer el atrevimiento, antes de ser casada con Ybieta de insultar a la consorte del Regidor Fiel Ejecutor Don Pedro de Ascárate, llenándole en su casa misma de las mayores injurias: entónces salió a la Plaza su calidad, y circunstancias, de las que no pudiendo vindicarse en el Tribunal de Su Alteza, en donde se le mandó calificase ser viuda honesta, y no pudiéndolo hacer, fué condenada a perpetuo silencio, con un apercibimiento serio, y condenación de costas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.91v.). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta tenía "...una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

<sup>1469</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61.

<sup>1470</sup> fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, hijo de Antonio Obligado y de Fausta Fernández; habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta, nieta de Petrona de Peñaranda; y en segundas nupcias con Juana Tejedor, hija del Teniente Coronel Miguel Tejedor y de Manuela Garayo (Cutolo, V; Fernández de Burzaco, V, 46; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 7059).

<sup>1471</sup> Dueño de Campo Santo, introductor de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

<sup>1472</sup> Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (Cornejo, 1972, 14).

<sup>1473</sup> Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (Cornejo, 1972, 107).

<sup>1474</sup> Cúneo-Vidal, 1978, 180.

<sup>1475</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29; y Gandía, 1929, 181-183.

---

<sup>1476</sup> Acevedo, 1982, 63-91.

<sup>1477</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>1478</sup> Levillier, 1915, II, 153.

<sup>1479</sup> General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebberos, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; Allende Navarro, 1964, 97; y Lazcano, I, 27).

<sup>1480</sup> La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Allende Navarro, 1964, 87; y Lazcano, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (Lazcano, 1936, I, 35). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

<sup>1481</sup> El 28-IX-1772 le fué librado el despacho de Regidor Propietario (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folio 485). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, muy probablemente hija o sobrina del Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí, Coronel Phelipe Santiago de Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

<sup>1482</sup> Nacido en Gordejuela, España, casóse con Ignacia de Argüello y Funes, hija de Miguel de Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Padres del Dr. Leopoldo, de José Antonio de Allende, y de María Mercedes de Allende y Argüello, mujer de Juan Domingo de Berrotarán y Carricaburu (Calvo, 1936, I, 19 y 59; y III, 54; Tejerina Carreras, 1974, 14; y Mayol Laferrere, 1974, 31-33). Según Allende Navarro (1964) María Ignacia Argüello, la mujer de Antonio Allende, era hija del Cap. Jose de Argüello y Moyano, y de Mariana de Baigorri y Brizuela, y hermana de la mujer de José Moyano Oscariz, del Cap. Pedro Argüello y

---

Baigorri, y de Juan Antonio de Argüello y Baigorri, casado con Sinforosa de Tejeda y Ledesma. Mariana de Baigorri y Brizuela fué a su vez hermana del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, marido de Gabriela de Garay y Tejeda, y tía de María Teresa de Baigorri y Tejeda, mujer primero de Bernardo Vélez de Herrera, y luego del Regidor Juan Vicente Piñero Pacheco, abuelos de Dalmacio Vélez Sarsfield (Allende Navarro, 1964, 145). Por lo tanto, Antonio de Allende era tío de la mujer de Simón de Azcoitia y Gonsález; abuelo de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga; y tío en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende, y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende (Lazcano, I, 53). En 1771 Antonio de Allende fué nombrado Administrador de Santa Catalina, propiedad secuestrada a la Compañía de Jesús (AGN, División Colonia, Sala IX, 21-9-5).

<sup>1483</sup> Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

<sup>1484</sup> Socolow, 1987, 96.

<sup>1485</sup> ver los trabajos de Villalonga (1909) y Salessi Sémper (1931).

<sup>1486</sup> Archivo General de la Nación (AGN), División Colonia, Justicia, Leg.16, Exp.399; Leg.7, Exp.94; y Leg.8, Exp.131.

<sup>1487</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

<sup>1488</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.53, Exp.1553.

<sup>1489</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, año 1759, fs.203v.

<sup>1490</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, año 1761, fs.298, citado en FB, VI, 186.

<sup>1491</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, año 1789, fs.96.

<sup>1492</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, año 1787, fs.90.

<sup>1493</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

<sup>1494</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.B-6, Exp.3.

<sup>1495</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.55, Exp.1607.

<sup>1496</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

<sup>1497</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

<sup>1498</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián (1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo (Moreno Cebrián, 1976, 228).

<sup>1499</sup> No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes,

---

estadias en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaran.

<sup>1500</sup> Eduardo R. Saguier (1991): "La Corrupción de la Burocracia Colonial y los Orígenes del Federalismo: El caso del Virreinato del Río de la Plata", ponencia presentada en las IX Jornadas Nacionales de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica, en Octubre de 1988.

<sup>1501</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz y Herrero, Cádiz, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.22v.).

<sup>1502</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.24).

<sup>1503</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz Herrero, Cádiz, 31-VII-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.36).

<sup>1504</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235; citado por Correa Luna, 1918, capítulo X.

<sup>1505</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

<sup>1506</sup> "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...". A todos los sujetos que eran destinados a empleos "...cuias rentas o sueldos no pasen de seiscientos pesos, se les libraré el haber de un año, a descontar en quatro, reteniéndoles la quarta parte en cada uno, repartida por mesadas= Al que tenga más de seiscientos pesos hasta mil, se le socorrerá con seiscientos pesos a pagar con el descuento de la tercera parte del sueldo, siempre que este llegue a setecientos pesos, pues de lo contrario solo se le retendrá la quarta parte= El que pase de mil pesos hasta mil quinientos, tendrá setecientos pesos de habilitación, y sufrirá el descuento de la tercera parte.= El que goce de más de mil y quinientos hasta dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos a satisfacer con igual descuento de la tercera parte.= El que disfrute sobre dos mil pesos hasta dos mil y quinientos, percibirá mil pesos, y se le retendrá también la tercera parte de su haber.= Al que cuya dotación se exceda de dos mil y quinientos pesos hasta quatro mil, será habilitado con mil y doscientos pesos, y los reintegrará sufriendo igual descuento de la tercera parte.= Al que componga más de quatro mil hasta seis mil pesos, se le librarán dos mil, los que satisfará, dexando la mitad de su haber mensual, siempre que tenga cinco mil y quinientos pesos de sueldo anual, pues no llegando a esta quota, solo se le retendrá la tercera parte.= El que pase de seis mil hasta ocho mil, percibirá tres mil, a pagar también con retención de la mitad de su haber mensual= Y a todo el que tenga más de ocho mil pesos, se le librará la mitad de su respectivo sueldo, baxo la calidad de hacer el reintegro con igual descuento de la mitad integra del que goce= De esta regla general quedarán excluidos únicamente los

---

Virreyes, Arzobispos, y obispos, a quienes se darán las habilitaciones que necesiten, conforme a las familias que lleven, y al carácter de sus altos empleos, y dignidades, y se acordarán con cada uno los términos en que deberán verificar los reintegros... Las entregas en los mencionados Puertos de Cádiz y La Coruña, se harán en pesos de a ciento y veintiocho quartos, y los reintegros en Indias en pesos fuertes, conforme a la práctica generalmente establecida, por ser esta la correspondencia que tiene la moneda provincial, o de vellón de España, con la nacional o fuerte que se labra y corre en América... inmediatamente que ocurra el fallecimiento de cualquiera Provisto habilitado por S.M. se considere que no alcanzará su producto a satisfacer en el todo el descubierto en que se halle con el Real Erario, no por eso dexarán de librar sobre él los respectivos Ministros lo necesario para su funeral y entierro, haciéndose con la debida moderación y conforme al carácter del empleo que hubiese servido, pues lo contrario sería opuesto y ofendería a la religiosa piedad de S. M.... Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

<sup>1507</sup> Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía por \$2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de \$1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M. Olazábal por valor de \$4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domingo de Vea y Murguía por valor de \$3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de \$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

<sup>1508</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

<sup>1509</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

<sup>1510</sup> Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).

<sup>1511</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

<sup>1512</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

<sup>1513</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

<sup>1514</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

<sup>1515</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

<sup>1516</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

<sup>1517</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

<sup>1518</sup> Idem.

<sup>1519</sup> Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; con cuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

<sup>1520</sup> marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y con cuñado de Diego Tejedor y Solórzano (Fernández de Burzaco, II, 149; y VI, 343; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 3289).

<sup>1521</sup> Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y con cuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989,

---

ítem 5161).

<sup>1522</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>1523</sup> Casó en 1776 con María Ignacia de Isasi, hija de Don Juan Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, sobrina de Don Nicolás de Azcoeta, y nieta materna de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). María Ignacia Isasi era viuda del Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro. Viuda por segunda vez, entra en enero de 1800 en la Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando como dote una casa de cal y canto avaluada en \$18.000 (Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6). Miguel de Learte fué padre natural de María Josefa Learte, quién casó con José Bienvenido, del cual se divorció, y fueron a su vez padres de María Gregoria, María Pascuala, Pantaleón, y María Manuela Bienvenido (AGN, Tribunales, Leg.111, Exp.2). En 1765 su apoderado Juan Estéban de Anchorena hace información sobre calumnias levantadas contra Learte en las ventas de unos géneros (AGN, Tribunales, Leg.A-11, Exp.4). En 1787 se ordena proceder contra sus fiadores Manuel Alfonso Ginés, Felipe Santiago del Pozo, y Juan de Lezica (AGN, Reales Ordenes, Libro 17, fs.36; y Libro 16, fs.234). En 1790 Learte se queja al Gobernador de Salta por malos tratos (AGN, Tribunales, Leg.66, Exp.2). En 1793 solicita que como Contador Real de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba y Sindico Procurador del Monasterio de Santa Catalina de Sena, se le guarden todos los fueros y libertad de cargos concejiles y militares que le corresponden (AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897). Y en 1795 es confirmado como Contador del Ramo de Diezmos (AGN, Reales Ordenes, Libro 25, f.477). Fué autor de unas curiosas memorias denominadas "Fracasos de la Fortuna y Sucesos Varios", donde relata todas sus peripecias en América, publicadas en 1926 por el R.P. Grenón S.J., en la serie Documentos Históricas (Córdoba; Archivo de Gobierno).

<sup>1524</sup> Learte, 1926, 281.

<sup>1525</sup> Acevedo, 1965, 183-184. Aún no he podido hallar que clase de parentesco mantuvo con el gran comerciante español residente en Salta Agustín de Erquicia, socio de Mateo de Saravia y Jáuregui.

<sup>1526</sup> Acevedo, 1965, 139.

<sup>1527</sup> Según Acevedo (1965), Maguna declaró haber descubierto un camino más corto entre Santiago del Estero y Corrientes (Acevedo, 1965, 76).

<sup>1528</sup> Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olachea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

<sup>1529</sup> Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349.

<sup>1530</sup> *Ibidem*.

<sup>1531</sup> AGN, Sala IX, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.3.

<sup>1532</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

<sup>1533</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41.

<sup>1534</sup> *Ibidem*.

---

<sup>1535</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

<sup>1536</sup> Hija del Alcalde y Procurador General de Santiago del Estero Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar y de Petrona de Paz y Figueroa, cuñada de José Pelayo de Alcorta, del Comandante Gregorio Díaz y de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104).

<sup>1537</sup> María Roberta Zuasnábar al Virrey, Santiago del Estero, 11-II-1796 y 11-VI-1796 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

<sup>1538</sup> Idem.

<sup>1539</sup> AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

<sup>1540</sup> AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

<sup>1541</sup> Cuñado del clérigo Maestro Juan Rodríguez (Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 [AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7]).

<sup>1542</sup> Casó en primeras nupcias con Narcisa Suárez, y en segundas nupcias con Petrona Santillán, hija de José Domingo Santillán y de Margarita Gramajao; y fué suegro de Pedro Francisco Carol y de Pedro José Maldonado (Figueroa, 1927, 113).

<sup>1543</sup> AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

<sup>1544</sup> Ibidem.

<sup>1545</sup> Ibidem.

<sup>1546</sup> Hijo de José de Cáceres y de Catalina María Pérez de Rosas, naturales de Santa Cruz de Tenerife (Fernández de Burzaco, II, 31).

<sup>1547</sup> Hijo de Isidro de Ortega y de Juana Isabel de Esquivel, naturales del Paraguay; y cuñado de Pedro Pablo Pavón (Fernández de Burzaco, V, 80).

<sup>1548</sup> Sala de Tourón, 1967, 119; y Apolant, 1966-76, II, 863-865.

<sup>1549</sup> Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de Acosta.

<sup>1550</sup> Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y Argañaráz.

<sup>1551</sup> Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y de Ana Maciel, concuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y suegro del Teniente Gobernador de Corrientes Coronel Juan García de Cossio y Gómez de Cossio, Manuel de Vedoya y Cossio, e Isidoro Martínez de Cires (Calvo, I, 299; Labougle, 1953, 170).

<sup>1552</sup> Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros Correntinos de 1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de Ignacia Maciel Cabral de Melo, prima hermana de María Ignacia Caravallo, mujer del comerciante José Antonio Mieres, y en segundas nupcias con Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don José de Acosta (AGN, Criminales, Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelión contra el Gobernador de Corrientes Manuel de Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

<sup>1553</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

---

<sup>1554</sup> *Ibidem*.

<sup>1555</sup> *Ibidem*.

<sup>1556</sup> Probablemente hermano del Capitán Isidro de Roxas y Aranda, marido de María Servín, y padre de María de Roxas y Aranda, mujer de Diego de León y Valdivia, fallecido en 1771 (Quevedo, 1984, 97).

<sup>1557</sup> Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>1558</sup> *Ibidem*.

<sup>1559</sup> *Ibidem*.

<sup>1560</sup> *Ibidem*.

<sup>1561</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.7.

<sup>1562</sup> Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

<sup>1563</sup> Hijo del Capitán José María Dávila y de Petronila Brizuela y Doria, y marido de María Rosa del Moral, y padre del General Miguel Gregorio Dávila y del Coronel Nicolás Dávila.

<sup>1564</sup> Casó con María Josefa Villafañe, hija del Alcalde Provincial Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán, y padres del Gobernador Jacinto del Rincón y Villafañe, asesinado por la montonera de Facundo. Era concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

<sup>1565</sup> Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

<sup>1566</sup> Pagden, 1997, 179.

<sup>1567</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

<sup>1568</sup> Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón, de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guinazú, 1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

<sup>1569</sup> Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

<sup>1570</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

<sup>1571</sup> Hijo del mercader Jacinto Bernardo de Aldao, natural de San Roque de la Piedra, La Coruña, y de María Teresa Rendón y Lariz, porteña (Fernández de Burzaco, I, 61). Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candiotti, hija de Antonio Candiotti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candiotti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candiotti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao

---

Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

<sup>1572</sup> Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En 1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN, Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5, Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

<sup>1573</sup> Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

<sup>1574</sup> hijo de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

<sup>1575</sup> hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (CN, 1983, 76).

<sup>1576</sup> Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y Eudara, sobrino de Martín de Gamboa (marido de Dionisia Morón), vecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (CN, 1983, 66 y 71; y FB, IV, 399).

<sup>1577</sup> En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773 Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12, Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

<sup>1578</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

<sup>1579</sup> Idem.

<sup>1580</sup> Idem.

<sup>1581</sup> Idem.

<sup>1582</sup> José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

<sup>1583</sup> José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

<sup>1584</sup> Idem.

<sup>1585</sup> El Regidor Defensor General de Pobres al Virrey Joaquín del Pino, 1-X-1802 (AGN, División Colonia,

---

Intendencia de Córdoba, Leg.13, Sala IX, 6-1-1).

<sup>1586</sup> Levene, 1911, 124-125; y Lynch, 1958, 204; y 1967, 192.

<sup>1587</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

<sup>1588</sup> El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás Guilleto, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibidem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibidem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibidem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibidem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

<sup>1589</sup> Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

<sup>1590</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

<sup>1591</sup> Ibidem.

<sup>1592</sup> Casó con una hija de Vicente Sánchez de Loria y Jofré y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y fué padre de Sebastiana Echegaray, mujer de Ignacio Sánchez Gallen (Calvo, II, 48; IV, 264; y V, 29).

---

<sup>1593</sup> Hijo de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

<sup>1594</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

<sup>1595</sup> Estas pugnas se desarrollan con mas detalle en otro trabajo de este autor titulado "La campaña contra el nepotismo en los orígenes de la Revolución. El Discurso político reformista en los Cabildos de las provincias del Río de la Plata (1790-1810)".

<sup>1596</sup> Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel Fernando Bravo de Rueda, y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). En 1787 pide permiso para pasar a Santiago del Estero (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.356). En 1790 es nombrado Subdelegado de Santiago del Estero en reemplazo de Baltasar Gaya (AGN, DNCE). Era concuñado de Pedro de Medina y Montalvo. Puede haber sido el padre del rematador del Ramo de Sisa en Córdoba, llamado Antonio de Palacio y Amavíscar.

<sup>1597</sup> Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olachea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

<sup>1598</sup> Manuel de Palacio al Virrey, Santiago del Estero, 13-II-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7). Ver también AGN, División Colonia, Interior, Leg.46, Exp.8, fs.18.

<sup>1599</sup> Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

<sup>1600</sup> Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

<sup>1601</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

<sup>1602</sup> Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

<sup>1603</sup> Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110).

<sup>1604</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

<sup>1605</sup> *Ibidem*.

<sup>1606</sup> *Ibidem*, fs.25.

<sup>1607</sup> *Ibidem*, fs.26v.

<sup>1608</sup> Pike, 1958, 144.

<sup>1609</sup> Burkholder y Chandler, 1984, 22.

---

<sup>1610</sup> Burkholder y Chandler, 1984, 22.

<sup>1611</sup> Burkholder y Chandler, 1984, 22.

<sup>1612</sup> Alcalde de Primer Voto Lic. Martín de Tapia, Alcalde de Segundo Voto Tomás Antonio de Ayarza, Alcalde Mayor Provincial José Mariano del Castillo, Fiel Ejecutor Simón Romano, Regidores Perpetuos José Antonio Ramallo y Melchor Saavedra, Alcaldes de Hermandad Juan Tomás Moscoso y Pérez y José Gavino Ruiz de Sorsano, Mayordomo de Renta de Propios Antonio de Ensima y Defensor de Menores Clemente López (AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25).

<sup>1613</sup> Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

<sup>1614</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25.

<sup>1615</sup> Idem.

<sup>1616</sup> Idem.

<sup>1617</sup> Idem.

<sup>1618</sup> vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

<sup>1619</sup> AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

<sup>1620</sup> Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, II, 142). Guillello remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>1621</sup> Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiola; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

<sup>1622</sup> Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (Lazcano, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio González, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orenco Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (jMayol Laferrere, 1975; Lazcano, I, 1936, 445).

<sup>1623</sup> Nicolás García Gilledo a Juan José Vértiz, Córdoba, 5-I-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-79, Sala IX, 5-9-4).

<sup>1624</sup> Entre sus principales acreedores figuraban Manuel Escalada, José Almoríña Caro, Pedro José Doye, M. Sánchez, José Iturriaga, Nicolás de Acha, Pablo Tompson, Manuel José de Borda, Francisco Alvarez Campana, Ignacio de Irigoyen, Inés Jijano y Castro, T. Martínez, J. Alsina, Miguel Alfonso de San Ginés, Bernardo Sancho Larrea, José de San Pedro Lorente, Joaquín Pinto de los Ríos, Domingo Antonio de Veá y

---

Murguía, Julián Gregorio de Espinosa, Manuel Rodríguez de la Vega, y José León Barua (AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs.171; Reg.2, 1755, fs.366 y 610v.; Reg.1, 1755, fs. 314; R.2, 1756, fs.280; R.5, 1756, fs.210 y 137; R.2, 1754, fs.622 y 647; R.1, 1757, fs.102v.; R.2, 1757, fs.122v.,113v., y 105; R.4, 1758, fs.34; R.1, 1759, fs.129v.; R.6, 1759, fs.166v.; R.2, 1761, fs.29; R.1, 1761, fs.15v.; R.4, 1761, fs.31, 29v.,18, 13, 310v., 317 y 330v.; R.2, 1761, fs.229v.; R.5, 1761, fs.252; R.4, 1763, fs.2v., 8, y 9; R.4, 1764, fs.42v. y 47; R.5, 1764, fs.29; R.2, 1765, fs.77v.; R.4, 1765, fs.39; R.6, 1765, fs.64v.; R.2, 1766, fs.10v., 36v., y 39v.; R.4, 1766, fs.138; R.3, 1770, fs.83v.; R.4, 1770, fs.66 y 67; R.5, 1770, fs.35; R.6, 1771, fs.89v.; R.3, 1772, fs.236v.; R.2, 1778, fs.38; R.2, 1780, fs.1; y R.3, 1780, fs.86v.

<sup>1625</sup> Entre sus acreedores se registran Juan Tomás Echever, Ignacio Alfonso Marcó, Francisco Seguro, Domingo Basabilbaso, Bernardo Sancho Larrea, Juan de Lezica y Torrezuri, Vicente Azcuénaga, J. Mojaime, y Juan Antonio de Lezica (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.37v.; R.3, 1767, fs.176; R.6, 1767, fs.59; R.3, 1770, fs.175 y 176; R.5, 1772, fs.188; R.6, 1772, fs.287 y 283v.; R.5, 1773, fs.303; R.4, 1774, fs.4v.; y R.6, 1774, fs.70v.)

<sup>1626</sup> AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

<sup>1627</sup> Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

<sup>1628</sup> Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correás; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

<sup>1629</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

<sup>1630</sup> Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

<sup>1631</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

<sup>1632</sup> Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

<sup>1633</sup> Natural de la Villa de María (Galicia), casado con Ana Victoria de Villafañe y Dávila, padre de José Fermín Soaje y Villafañe, casado con Manuela Antonia Dávila del Moral (Cutolo, VII, 130; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

<sup>1634</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.89, Exp.2313.

<sup>1635</sup> Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila, hermano de Francisco Antonio y de Domingo Ortiz de Ocampo, marido de María del Tránsito de Luna y Carmona, y padre de Andrés Nicolás, Ventura, y Amaranto Ocampo y Luna.

<sup>1636</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1. Según Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el contrabando "...que tanto vocifera [Noroña] haber aprehendido a mi hermano [Domingo] era reducido a siete masos pequeños de tabaco tarijeño comprados en la tercena de San Carlos, jurisdicción de Salta, para su gasto y consumo por la suma escasez, que de ese efecto se padecía en el partido de Anguinán y en toda la jurisdicción de La Rioja. La noticia que tuvo D. José Noroña de esos siete masos de tabaco fue bastante para que conduciéndose a casa de Dn. Amaranto con el ruidoso aparato de hombres armados hiciese un registro general de todas las viviendas sin dispensar rincón alguno, ni aún las tinajas de vino; y el hallazgo de los siete masos fue todo el material para la causa, que le fulminó por despique y venganza (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37).

---

<sup>1637</sup> mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

<sup>1638</sup> Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vázquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60).

<sup>1639</sup> Según Francisco Alfonso Pereira, Ortiz dependía del Regidor Francisco Gregorio Blanco "...por su pobreza y miseria", pues "...aún le debe a Don Juan de Dios Furque o ha debido el valor del oficio". Su pobreza o miseria era "...notoria pues sin embargo del oficio que tiene por poder comer sirve de plumista en Temporalidades por seis u ocho pesos al mes. Pero quien duda que esta misma condición de no tener que perder presta a muchos animosidad para entrar en la empresa más ardua y que de ellos se valen muchas veces los más taimados y cautos para ponerlos a la frente y hacerlos Autores de sus venganzas y de sus insultos y de sus injusticias para no exponer sus caudales que es lo que a mi entender puntualiza este caso" (AGN, Tribunales, Leg.69, Exp.14, fs.200).

<sup>1640</sup> hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan Vázquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (CC, IV, 327).

<sup>1641</sup> El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor y Maestre de Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré, y se desposó en 1787 con Clara de la Rosa y Torres, hermana de Francisco Borxa de la Rosa, y de Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de Antonino Aberastain. Fue padre de Salvador María del Carril (Carte, 1958).

<sup>1642</sup> Regidor Perpetuo, Depositario General de San Juan en 1776 y 1789. Casado con María Gómez de la Quintana, padres de Juana de la Cruz Blanco, desposada en 1811 con Domingo Manuel de Albarracín y Allende, hijo de Alejandro Albarracín Irrazábal y de Justina de Allende Quiroga Sarmiento (CC, V, 29).

<sup>1643</sup> AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

<sup>1644</sup> AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

<sup>1645</sup> Socolow, 1987, 106.

<sup>1646</sup> Peralta Ruiz, 1991, 149.

<sup>1647</sup> Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

<sup>1648</sup> De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

<sup>1649</sup> Trimberger, 1978, 439.

<sup>1650</sup> Trimberger, 1978, 440.

<sup>1651</sup> Véliz, 1984, 92.

---

<sup>1652</sup> Moreno Cebrián, 1976, 228. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadias en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaran. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

<sup>1653</sup> Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

<sup>1654</sup> Boxer, 1970, 466-469; 466-469; y Lohmann Villena, 1976, 579-639.

<sup>1655</sup> AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.33, fs.333v. y v.30, fs.394.

<sup>1656</sup> Vicuña Mackenna, 1882, 40.

<sup>1657</sup> Idem.

<sup>1658</sup> Idem.

<sup>1659</sup> Peña, 1911, 59-61; Levene, 1927, 1952, 178; y Scenna, 1968, 82.

<sup>1660</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1015, fs. 37.

<sup>1661</sup> Dinerales eran las pesas menudas con que en ese entonces se arreglaba el peso justo que debían tener las barras y monedas. El dineral de oro se dividía en 24 quilates y cada quilate en 4 granos. El de plata se dividía en 12 dineros y cada dinero en 24 granos.

<sup>1662</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1015, fs.8.

<sup>1663</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 36, Exp. 933.

<sup>1664</sup> Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710, hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en Cuzco (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120).

<sup>1665</sup> Ventura de Santelices y Venero al Virrey del Perú, Conde de Superunda, Potosí, 15-VII-1752 (AGN, División Colonia, Potosí, 1751-54, Sala IX, 6-2-6).

<sup>1666</sup> Tandeter, 1980, 49-51.

<sup>1667</sup> Ibidem, 267.

<sup>1668</sup> Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el Imperio Otomano, ver Genç, 1987.

---

<sup>1669</sup> Farré, 1941, 96.

<sup>1670</sup> sobre la Sisa, ver Gullón Abao, 1993, 125-154.

<sup>1671</sup> Punta, 1988, 5. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el Ramo de Propios y Arbitrios era administrado por el Mayordomo de Propios de cada Cabildo. Luego de dicha fundación la Junta Municipal de Propios y Arbitrios la formó el Tribunal Mayor de Cuentas con el Gobernador o Corregidor, el Alcalde de Primer Voto, el Regidor Decano, y el Escribano; y a partir de la Real Ordenanza de Intendentes, en 1784, se formó con el Alcalde Ordinario de Primer Voto, dos Regidores y un Síndico Procurador. La misión de esta Junta era ocuparse de la venta de los cargos capitulares (Lynch, 1967, 201; y Ornaghi y Franciosi, s/f, 42 y 61).

<sup>1672</sup> Ots Capdequí, 1946, 77; Punta, 1988, 9; y Acevedo, 1990, 10. El Reglamento del Ramo de Sisa aprobado por el Virrey del Perú en 1772 mandaba que su caja, caudales, libros y papeles pasaran a poder de los Alcaldes Ordinarios y del Síndico Procurador General (Ornaghi y Franciosi, s/f, 23). La creación de los Blandengues fué a juicio de Halperín Donghi (1982) "...el resultado de la transformación en veterana de una fuerza originariamente miliciana destinada a la guarda de la frontera" (Halperín Donghi, 1982, 28).

<sup>1673</sup> Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

<sup>1674</sup> Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta, asesinado por los indios Pampas. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

<sup>1675</sup> Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

<sup>1676</sup> plaza de nueva creación, para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas. Como prueba de ello, desde el desplazamiento del Teniente

---

Oficial Real Francisco Javier Garay en 1760, hasta 1767, firma las entradas del ramo de Sisa el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León, y desde 1767 hasta 1770 el Teniente de Rey Fernando Fabro. En febrero de 1770 el Ramo fué arrendado a José Rodríguez, el que adquiriera la estancia de Alta Gracia a las Temporalidades, y fuera padre del jurista Victorino Rodríguez (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86, y 99-100).

<sup>1677</sup> Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

<sup>1678</sup> *Ibidem*.

<sup>1679</sup> AMC, Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

<sup>1680</sup> La Real Hacienda contaba con un Teniente de Oficiales Reales asignado en la ciudad de Córdoba (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86).

<sup>1681</sup> Sánchez Albornoz, 1965a, y 1965b; y Cornejo, 1977 y 1979. Al pasar por Tucumán Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por qué ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa [bajo el control del Cabildo desde 1772] por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en \$4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias, se ahorrase los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba, debiendo haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, fs.52).

<sup>1682</sup> Félix Cabrera Celis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteledo de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240; y LC, III, 195).

<sup>1683</sup> Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de María Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

<sup>1684</sup> Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San

---

Román (LC, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

<sup>1685</sup> Padres de Rosa Noble Canelas y Echenique, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana, hijo de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta, naturales de Lebrija, Sevilla, padres a su vez de Agustina Arana, casada el 1-X-1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

<sup>1686</sup> AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXIX, mayo de 1754.

<sup>1687</sup> Cabrera, 1930, 13.

<sup>1688</sup> en Salta conocidos por el nombre de partidarios.

<sup>1689</sup> AGN, Bandos, Libro 1, fojas 346, y 356-357. Ver Rázori, 1945, II, 42-45; y Levene, 1962, 442.

<sup>1690</sup> estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937,1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; y LC, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

<sup>1691</sup> contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; LC, II, 203).

<sup>1692</sup> Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Phelipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

---

<sup>1693</sup> Acevedo, 1972, 257.

<sup>1694</sup> *Ibidem*.

<sup>1695</sup> Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>1696</sup> Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Alborno y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Córdoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>1697</sup> nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en LC, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano; y padre del Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

<sup>1698</sup> Acevedo, 1972, 258.

<sup>1699</sup> AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757, f.53.

<sup>1700</sup> *Ibidem*. Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban además el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

<sup>1701</sup> AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

<sup>1702</sup> General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebberos, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (CC, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

<sup>1703</sup> Natural de Galicia, casado con Clara Echenique, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (LC, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crimen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato

(AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte un juicio por injurias (AHC, Crimen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). En 1779 el Maestre de Campo Diego de las Casas denuncia que Martínez "...intenta desconceptuarlo seduciendo al efecto a un mulato malévolo, nombrado Tomás Andrada, para que instruya queja del castigo que le impuso" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Sala IX, 5-9-4). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de Potosí, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9). En 1792 Joaquín Pérez vende su parte en la Hacienda-Ingenio de Guariguay, Potosí (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691).

<sup>1704</sup> Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien según Furlong se le adjudicó erróneamente la autoría de la poesía latina *Laudatione Quinque* (Furlong, 1937, 1952), y tía segunda de Sor María Antonia de la Paz y Figueroa. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). La personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero (1976), o más bien victimarias de las que nos habla Vicuña Mackenna, se nos ha revelado en ocasión de la crisis desatada en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a una carta del R.P. Pedro Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo Histórico de Córdoba, donde el primero le relata al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José Martínez, Doña Clara Echenique, hija del Alcalde Ordinario Gerónimo Luis de Echenique,

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta gobierna, a su marido, y según pude entender, y supe después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que admitiese composición, y de que fuese de corazón tan apocado, que siendo el ofendido conviniese, en irse a humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa como a pedirle perdón. A la tarde conocí luego que el corazón del Alcalde estaba mudado, y aunque salió conmigo de la cárcel, luego, que estube en la calle me dixo: Como quiere Padre, que vaya a casa de el Teniente de Rey; vamos antes al aposento de V.R. todos, y allá, haremos las paces: mire, añadió mi Padre, que mi mujer sabiendo, que he hecho esta vajeza, me ha de cerrar las puertas de Casa a la vuelta, de hay no lo pude sacar, y por no perder lo que tenía trabajado, volví con esta novedad a Casa del Teniente de Rey, donde estaban esperando" (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766 [AHC, Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.46-48].

Como las negociaciones duraron varias semanas más, el R.P. Andreu interpuso un nuevo sujeto de mediador, el cual le aseguraba

"...que por Martínez no habría habido dificultad, pero que su mujer le dixo, separa tu caudal, que fué corto, los treinta y cinco mil pesos, que traxe en dote, los he de gastar en esta causa, porque el agravio no se ha hecho a tí sino a mí, y a toda mi parentela" (Ibídem).

<sup>1705</sup> AHC, Escribanía N.2, 1759, Leg.29, Exp.3.

<sup>1706</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero, sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

<sup>1707</sup> Acevedo, 1969, 23; y 1990, 10.

<sup>1708</sup> Acevedo, 1990, 10.

---

<sup>1709</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

<sup>1710</sup> *Idem*, fs. 1.

<sup>1711</sup> *Idem*, fs. 3

<sup>1712</sup> *Idem*, fs. 3.

<sup>1713</sup> nacido en San Juan, hijo de Domingo de Garfias y de Catalina de Quiroga; casó en primeras nupcias en Areco con Ramona de las Casas, nieta de Juan de las Casas y de Dominga Romero Gutiérrez, y en segundas nupcias con Antonia de Giles Rivadeneyra; suegro de Juan Milloney, de Bernardo Poblaciones y de Juana Agustina Gallen; y abuelo de la mujer del General Miguel de Azcuénaga (FB, II, 89; y III, 155).

<sup>1714</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>1715</sup> *Ibidem*.

<sup>1716</sup> Halperín Donghi, 1992, 14.

<sup>1717</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

<sup>1718</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

<sup>1719</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2. Era nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

<sup>1720</sup> Birocco, 1992, 20.

<sup>1721</sup> Punta, 1988, 14 y 23.

<sup>1722</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>1723</sup> No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pie en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

<sup>1724</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>1725</sup> *Ibidem*.

<sup>1726</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>1727</sup> *Ibidem*.

<sup>1728</sup> *Ibidem*.

<sup>1729</sup> *Ibidem*.

<sup>1730</sup> *Idem*.

<sup>1731</sup> *Idem*.

<sup>1732</sup> Sewell, 1990, 527-52; y Tarrow, 1993, 87 y 88.

<sup>1733</sup> Ver Vázquez Machicado, 1957.

---

<sup>1734</sup> Sobre la Revolución Comunera del Paraguay, ver Díaz Pérez, 1973.

<sup>1735</sup> En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los Corregidores de Indios.

<sup>1736</sup> Natural de Burgos, Asturias. Luego Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Propuso al Rey en un Informe abolir las encomiendas, organizar tropa reglada, y fomentar la complementación económica con el Alto Perú (Arréllaga, 1976, 55). Era marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce; padre del Coronel Agustín José de Pinedo, quien fuera marido de Juana Albizuri y Echauri; y suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y del Corregidor, Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y JR, 1989, ítem 5929). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

<sup>1737</sup> Lynch, 1958, 209.

<sup>1738</sup> AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

<sup>1739</sup> José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo Ysfrán, Camboño, Barrazábal, Melo, Lafuente, y Arias Saravia, en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires).

<sup>1740</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.56, Exp.6.

<sup>1741</sup> Idem.

<sup>1742</sup> Arias Divito, 1978, 7. En las tercenas, a cargo de la venta al por mayor, se gratificaba al 7%; y en los estanquillos, a cargo de la venta al por menor, se gratificaba al 5% (Arias Divito, 1987, 13).

<sup>1743</sup> Guzmán, 1985, 268.

<sup>1744</sup> Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

<sup>1745</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

<sup>1746</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

<sup>1747</sup> Francisco Dávila y Doria, que era uno de los vecinos más distinguidos de La Rioja, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

<sup>1748</sup> Socolow, 1987, 292; Bravo Acevedo, 1984, 1986; Rivarola Paoli, 1988; y Aljovín de Losada, 1990.

<sup>1749</sup> Socolow, 1987, 292.

<sup>1750</sup> Phelan, 1967, 327; y Wiarda, 1973, 219. Sobre el cliéntelismo y el patrimonialismo en el mundo árabe, ver Schemeil y Leca, 1983.

---

<sup>1751</sup> Halperín Donghi, 1982, 39; y Walzer, 1993, 109-110.

<sup>1752</sup> Gelman (1985) y el que esto suscribe, en un artículo publicado en 1989, registraron la participación generalizada de la plana mayor de las Milicias de Corrientes y Buenos Aires en el reparto de mercancías.

<sup>1753</sup> Kuethe, 1992, 451.

<sup>1754</sup> Runciman (1983) concluye que en Francia "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

<sup>1755</sup> Wiarda, 1973, 219.

<sup>1756</sup> sustitutos de los destinados al servicio de Milicia, que se obtenían mediante la correspondiente paga.

<sup>1757</sup> Real, 1957, 75.

<sup>1758</sup> Rodríguez Molas, 1982, 272.

<sup>1759</sup> Martínez Ortega, 1989, 216.

<sup>1760</sup> privilegios estamentales judiciales que otorgaban a quien se integraba a una determinada corporación inmunidad contra el poder jurisdiccional común.

<sup>1761</sup> Ver Saguier, 1990, 1992, 1993a y 1993b.

<sup>1762</sup> Levaggi, 1971, 45.

<sup>1763</sup> Giddens, 1977, 274.

<sup>1764</sup> "...derecho de entablar litigio en sus propios tribunales contra personas de otro fuero" (Domínguez, 1985, 88).

<sup>1765</sup> Cahill, 1984, 272.

<sup>1766</sup> Kuethe, 1992, 452.

<sup>1767</sup> Stoetzer, 1992, 344.

<sup>1768</sup> Pérez de Arévalo, 1979; y Levaggi, 1989.

<sup>1769</sup> Ravignani, 1937, I, 10; y Díaz, 1952, 19, nota 4.

<sup>1770</sup> Ravignani, 1937, I, 187.

<sup>1771</sup> Diario de Sesiones de la H. Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires: Imprenta de la Independencia), 1822, 256ss, y 423, citado por Díaz, 1952, 22 y 24.

<sup>1772</sup> Ravignani, 1937, III, 995-999; y Silva, 1937, I, 877-883.

<sup>1773</sup> padre del que fuera Gobernador de Buenos Aires Mariano Acosta.

<sup>1774</sup> Ravignani, 1937, III, 995-999; y Silva, 1937, I, 880.

<sup>1775</sup> Archer, 1977, 198.

<sup>1776</sup> Era un eximio escritor, pues sus escritos están redactados con una prosa cuasi-cervantina. Sobrino de Urbano Espejo (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp. 16). Entre 1755 y 1757 contrajo con mercaderes

---

porteños diez operaciones de fiado por valor de \$13.168, importando yerba del Paraguay (AGN, Protocolos, Registro 2, año 1755, fs.573v., y 625v.; R.1, 1757, fs.280, 219v., y 214; R.2, 1757, fs.328v., 327v., 338v., y 340; y R.6, 1757, fs.283v.; y Sala IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7, fs.9v.). Su confirmación como Regidor de Tarija se obtuvo por Real Provisión de 3 de abril de 1764 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10; y Leg.14, Exp.8). El despacho de Coronel del batallón de Milicias se libró en 1775 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10). En 1782 recurre ante el Superior Gobierno por los agravios que le infirió el Cabildo de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.8). En 1786 presenta sus fojas de servicio para aspirar al título de Mariscal de Campo (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.10, Exp.11). Probablemente era hermano de José Hurtado de Mendoza, quien contrajo con mercaderes porteños, entre 1764 y 1785, media docena de operaciones de fiado por valor de \$17.331 (AGN, Protocolos, Registro 5, 1764, fs.114; R.6, 1764, fs.74v.; R.4, 1768, fs.213; R.2, 1768, fs.75 y 78v.; y R.5, 1785, fs.123).

<sup>1777</sup> Correa Luna, 1918, 225.

<sup>1778</sup> Cabodi, 1950, 109.

<sup>1779</sup> Probablemente hermano del Capitán Isidro de Roxas y Aranda, marido de María Servín, y padre de María de Roxas y Aranda, mujer de Diego de León y Valdivia, fallecido en 1771 (Quevedo, 1984, 97).

<sup>1780</sup> Melchor de Rojas Aranda al Gobernador del Río de la Plata, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>1781</sup> *Ibidem*.

<sup>1782</sup> Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 12-IX-1759 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>1783</sup> *Ibidem*.

<sup>1784</sup> *Ibidem*.

<sup>1785</sup> *Ibidem*.

<sup>1786</sup> *Ibidem*.

<sup>1787</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1788</sup> *Ibidem*.

<sup>1789</sup> *Ibidem*.

<sup>1790</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

<sup>1791</sup> Pillado, 1894, 411-416; y Suárez, 1984, 158.

<sup>1792</sup> Correa Luna, 1918, 225.

<sup>1793</sup> Hijo del Comisario de la Catedral de Arequipa Cipriano Villota y de Gertrudis Antolínez de la Riba (FB, VI, 287)

<sup>1794</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.12, Exp.9.

<sup>1795</sup> tío del Gobernador de Córdoba del Tucumán Juan Manuel Fernández Campero (Acevedo, 1965, 4).

<sup>1796</sup> Torre Revello, 1938, 14, nota 1.

<sup>1797</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1754, fs. 447; y Registro 6, 1797, fs. 177v.

---

<sup>1798</sup> hijo del Alcalde Martín de Alzaga, ajusticiado por el Triunvirato por contrarrevolucionario.

<sup>1799</sup> En 1765 Cabañas promovió una cuestión judicial en el Juicio de Residencia contra Fulgencio Yegros (Velázquez, 1981, 240). Esta cuestión obedecía a las acusaciones del Gobernador Interino Fulgencio Yegros de que Cabañas se hallaba implicado en la sublevación de la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, ocurrida ese año (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28).

<sup>1800</sup> Comandante de la Villa de Concepción, hijo del encomendero Ramón de Espínola y de Rosa de la Peña (Spangenberg, 1992, 378), y primo del Capitán Juan Ignacio Caballero, muerto en la Guerra de las Naranjas (Frakes, 1989, 505). Autor de "Eploración del Gran Chaco que llevó a cabo por mandato del Sr. Don Joaquín de Alós, teniente coronel de los Reales Ejércitos Don José de Espínola y Peña", editado por Blas Garay (Asunción, 1899). Fué brazo derecho del Gobernador Lázaro de Ribera (Furlong, 1954, 45). Para más información ver Molas, 1957, 96; y Cháves, 1959, 26.

<sup>1801</sup> Hijo de Fulgencio de Yegros y Ledesma y de Tomasa Franco Torres; y nieto del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252; y Velázquez, 1981, 213-285).

<sup>1802</sup> Aguirre, 1948, 291.

<sup>1803</sup> Se lo tenía por pariente del Virrey Marqués de Avilés. Ex-Corregidor de Chayanta; fué quien mantuvo el conflicto con Túpac Katari, el cual desató la conocida rebelión indígena.

<sup>1804</sup> Joaquín Alós al Virrey Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 10-XII-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Sala IX, Leg.3, 5-4-2).

<sup>1805</sup> Beverina, 1935, 224-225, cit. por Halperín Donghi, 1982, 34.

<sup>1806</sup> FB, V, 126.

<sup>1807</sup> muy similar a la renta media de una capellanía lega.

<sup>1808</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1799, fs.456.

<sup>1809</sup> AGN, División Colonia, Reales Ordenes, Libro 35, f.194.

<sup>1810</sup> Nacido en Junio de 1753 (AN, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiola, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 19-V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3).

<sup>1811</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.236, Exp.3.

<sup>1812</sup> Oficio del 16-XI-1804 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5). El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru (Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13). El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende (Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17). El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende (Archivo Museo Mitre, A.B., c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I., n.29). [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero].

<sup>1813</sup> AGN, División Colonia, Reales Ordenes, Libro 30, foja 98.

<sup>1814</sup> Ambrosio Funes y Francisco Antonio González, Córdoba, 16-IX-1807 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.15, Sala IX, 6-1-3).

<sup>1815</sup> *Ibidem*.

---

<sup>1816</sup> *Ibídem.*

<sup>1817</sup> *Ibídem.*

<sup>1818</sup> León Solís, 1989-90, 181.

<sup>1819</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>1820</sup> hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207).

<sup>1821</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>1822</sup> Saguier, 1989, 307.

<sup>1823</sup> designado por el Virrey del Perú.

<sup>1824</sup> a partir de la fundación del Virreinato del Río de la Plata las Cajas Reales de Potosí pasaron a depender de la Superintendencia de Real Hacienda con asiento en Buenos Aires.

<sup>1825</sup> la única aceptada por los acreedores gaditanos.

<sup>1826</sup> de cuatro, dos y un reales.

<sup>1827</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>1828</sup> *Ibídem.*

<sup>1829</sup> Hijo del Coronel Gregorio de Zegada, antiguo Situatista, y de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; marido de Ana María del Carmen Gorriti; hermano del R.P. José Miguel de Zegada; y padre del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801; y Gullón Abao, 1993, 120).

<sup>1830</sup> Cabos de partidas que obraban separadamente del ejército con determinado número de soldados que él mismo juntaba o elegía, pagados por el Ramo de Sisa.

<sup>1831</sup> Llamábase así al soldado pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiese ofrecer al oficial que manda y para las ordenes y avisos.

<sup>1832</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

<sup>1833</sup> *Ibídem.* En un resumen de pagos mensuales de los Regimientos de Dragones de Chulumani, pagados por el Corregidor José de Albizuri, un Capitán ganaba \$70, un teniente \$60, un subteniente \$50, los sargentos \$30, los tambores \$25, los cabos primero \$28, los cabos segundos \$25, y los soldados \$15 y 4 reales (Valle de Salinas, 1990, 420).

<sup>1834</sup> Hasta el momento en Salta hemos podido detectar sólo a Francisco Antonio González de San Millán (AGN, Sala IX, Interior, Leg.43, Exp.6). Fueron proveedores de las Tropas Veteranas destinadas a pacificar las provincias del Perú Antonio Sáenz de Texada, Ramón Ballivián, José Antonio Sanjurjo, y Martín José de Ochoteco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.7, Exp.18).

<sup>1835</sup> Probablemente padre del jurisconsulto Juan Francisco Sevilla y del Coronel Manuel Sevilla, Comandante del Fuerte de Orán en tiempos del Gobernador Felipe Heredia (Cutolo, VII, 87).

<sup>1836</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

---

<sup>1837</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1838</sup> Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan y Soria; hermano de Juan Martín de Pueyrredón; cuñado de Ambrosio Sáenz Valiente; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

<sup>1839</sup> Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta. Fué suegro de los Gobernadores de Tucumán Alejandro y Felipe Heredia. Alférez de Milicias en 1780, Teniente en 1782, y Capitán en 1784. Acompañó a su padre en la navegación del Río Bermejo. Creó el regimiento de caballería "Patricios de Salta", y luego el General Pueyrredón le quitó el mando y le llenó de desaires a consecuencia de lo cual falleció en 1811 (Cutolo, III, 52).

<sup>1840</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1841</sup> *Ibidem*.

<sup>1842</sup> *Ibidem*. El profesor Hans Vogel, de la Universidad de Leyden se halla actualmente investigando en las Listas de Revista de los regimientos del Ejército Expedicionario del Norte la incidencia que pudieron haber tenido las propiedades de los oficiales en el grado de desertión de la tropa.

<sup>1843</sup> María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada; y madre de Julián Gregorio de Zegada.

<sup>1844</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1845</sup> *Ibidem*. Según Mariano Gordaliza las Reducciones "...se fundaban a espaldas de los Fuertes, y para entrar a ellas se pasaba por el Fuerte. Así estuvo la de Miraflores en donde hasta el día perseveran los simientos del quadro del Fuerte en frente de la puerta del Colegio. Con los soldados a la puerta los indios son obedientes a quanto se les mande, pero sin ellos que podrá hacer un solo Religioso, ni un Administrador en un despoblado de Christianos y circundado de puros indios? Claro está que nada más que contemplarlos por no exponer su vida" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.63). Cada Reducción se componía "...de distintas Naciones, y cada Nación tiene distintos idiomas, y estos tan guturales, que no se pueden reducir a alfabeto para escribirlos y aprehenderlos. Si entre las parcialidades de una Reducción no se entienden como entenderían al Administrador ni este como les entenderá? Mas ¿Como los Padres podrán predicar a quien no les entiende, y como entenderán los Indios a quien no les predica en su Idioma?" (Idem, fs.60v.). Se preguntaba Gordaliza en 1804 "...¿cual era la causa por que se han reducido con tanta facilidad por un solo Religioso Fr. Francisco del Pilar once Pueblos de Indios Chiriguano en la Frontera de Santa Cruz a Tarija? ¿Cual es la causa por que me dice el Padre Prefecto de Misiones Fr. Estéban Primo Ayala, que mas quiere lidiar con 19 Pueblos nuevos de Chiriguano, que con solas las dos Reducciones que tiene a su cargo en Nuestra Jurisdicción cuales son los Matacos en el Río Seco, y la de Bejoses en Orán? No es otra cosa que los Chiriguano como hablan un idioma sólo, que lo sabe el Padre Prefecto, lo entienden a él, y el los entiende. Pero como los del Chaco, tienen diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino por Intérpretes, y estos tan perversos que explican lo que quieren" (Idem).

<sup>1846</sup> *Ibidem*.

<sup>1847</sup> *Ibidem*.

<sup>1848</sup> *Ibidem*.

<sup>1849</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1850</sup> Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte,

---

contrajo primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

<sup>1851</sup> Padre del prócer General Martín Miguel de Güemes.

<sup>1852</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>1853</sup> *Ibidem*.

<sup>1854</sup> *Ibidem*.

<sup>1855</sup> *Ibidem*.

<sup>1856</sup> *Ibidem*.

<sup>1857</sup> marido de María Viviana de Pinedo Montenegro, hija del gaditano Manuel Simplicio de Pinedo y de Petrona Montenegro Bustos y Arias de Cabrera, heredera de la estancia y potrero de Santa Bárbara en el Curato de Traslasierra, y del potrero de San Lorenzo, en jurisdicción de San Luis (Castellano Sáenz Cavia, 1970, 434). Padre del célebre poeta Juan Crisóstomo Lafinur.

<sup>1858</sup> Hija de Miguel Gerónimo de Sosa y de Melchora Sarco, esposa del gallego Agustín Fiadas.

<sup>1859</sup> Doña Ubalda Sosa al Virrey Pedro Melo de Portugal, La Carolina, 20-VI-1796 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.9, Sala IX, 5-10-4).

<sup>1860</sup> *Ibidem*.

<sup>1861</sup> AGN, Tribunales, Leg.61, Exp.2, fs.164.

<sup>1862</sup> *Ibidem*.

<sup>1863</sup> Seguidores del Gobernador-Intendente de Córdoba y luego Virrey del Río de la Plata Marqués Rafael de Sobremonte.

<sup>1864</sup> Seguidores del Alcalde Ambrosio Funes.

<sup>1865</sup> Entre los comerciantes de Córdoba que le siguieron pleito al Coronel Allende figuraban Francisco Joseph González, Lorenzo Recalde y Cano, Bernardo Vásquez, Antonio Iglesias, Domingo Baro, Pedro Antonio Savid, Francisco Enríquez Peña, Estéban Bouquet y Arias, Tiburcio Olmos, y José Yofre (AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.40, Exp. 42). Ver también Sala IX, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

<sup>1866</sup> Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964, 104).

<sup>1867</sup> Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de Pobres en 1792.

<sup>1868</sup> Regidor, Defensor de Pobres, Protector de Naturales en 1804, Alférez Real en 1807, nacido en Plencia, Bilbao, hijo de Juan de Recalde y Zabala y de Manuela de Oñate y Artazar, casó con Marina Antonia Vaz, hija de Francisco Vaz y de María Bibiana Yegros y Bustamante (Cutolo, VI, 82; Bustos Argañaráz, 1980, 26). Como Defensor de Pobres mantuvo diversos litigios (AGN, Tribunales, Leg.37, Exp.1; y Leg.103, Exp.16).

<sup>1869</sup> Hijo de José Antonio Ortiz del Valle y de Ana María Arias de Cabrera. Sus padres compraron a la Junta

---

de Temporalidades la estancia de "Los Santos Ejercicios", de 120 leguas cuadradas, entre los ríos III y IV. Fué hermano del Alcalde de Primer Voto José Asencio Ortiz, casado con Petronila Villalón y Blanco (Ortiz Bustos, 1973).

<sup>1870</sup> Bautizado en Mataró, Cataluña, en noviembre de 1760, hijo de Jaime Jofré y de Rosa Oliveras, contrajo primeras nupcias en Corrientes en 1791 con Ana Rosa Quiroga y Bolaños, hija de Bartolomé Quiroga y de Rosa Ruiz de Bolaños y Maciel Cabral; y segundas nupcias con Rosa Roca y Barquín, hija de Félix Roca y de María Josefa Barquín y Bustos (LC, II, 251; Buscá-Sust Figueroa, 1975, 11-30).

<sup>1871</sup> Casó en 1798 con Tomasa Josefa González, hija de Felipe Antonio González de Hermida y de Rosa Cándida Arias de Cabrera y Ceballos.

<sup>1872</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

<sup>1873</sup> *Ibidem*.

<sup>1874</sup> Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de María Antonia Espinosa de los Monteros, hija de Francisco Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V, 336-337).

<sup>1875</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

<sup>1876</sup> hijo de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano menor de José Manuel Allende, y primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la Bárcena. También era primo segundo de la madre del autor de las célebres Memorias, el General José María Paz, y primo tercero del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende y Torres casó con Inocencia Díaz de la Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de Juana Arias de Cabrera (Lazcano, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

<sup>1877</sup> Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

<sup>1878</sup> *Ibidem*.

<sup>1879</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

<sup>1880</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

<sup>1881</sup> *Ibidem*.

<sup>1882</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2.

<sup>1883</sup> facultad arbitraria ejercida por los Comandantes de Campaña (Real, 1957, 75). Ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.43, Exp.5.

<sup>1884</sup> Mayo, 1992, 48.

<sup>1885</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.2.

<sup>1886</sup> *Ibidem*.

<sup>1887</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.15, Exp. 323 (sin foliar).

<sup>1888</sup> Garavaglia, 1984, 25; y 1987, 228.

<sup>1889</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 387 y 388.

<sup>1890</sup> Mayo, 1987, 254; y 1992, 48.

---

<sup>1891</sup> Ver el alegato de Miguel de Azcuénaga contra Manuel Crespo en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.9, fs.108-114v.

<sup>1892</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.13, Exp.270. Gran parte de quienes ponían los personeros eran hacendados de la zona. Por ejemplo, Lorenzo Basualdo, Juan José Figueroa y Vicente Insaurralde eran hacendados. En cuanto a los personeros mismos, en la primer compañía de los 17 personeros cuatro provenían de Santiago del Estero y dos del Paraguay, y en la segunda compañía de los ocho personeros dos provenían de Corrientes y otros dos de Córdoba.

<sup>1893</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.60.

<sup>1894</sup> *Ibidem*.

<sup>1895</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.59v.

<sup>1896</sup> Tjarks, 1962, I, 198.

<sup>1897</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

<sup>1898</sup> Índice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año 1831 (Buenos Aires: Imp. La Tribuna, 1860), II, 335-336; el segundo caso citado por Schweistein de Reibel, 1940, 65, nota 103.

<sup>1899</sup> Frakes, 1989, 495.

<sup>1900</sup> AGN, Guerra y Marina, Leg.25, Exp.37.

<sup>1901</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.8.

<sup>1902</sup> *Idem*, fs.9.

<sup>1903</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.41.

<sup>1904</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1776, fs.83.

<sup>1905</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1778, fs.244; y Registro 6, 1779, fs.90v.

<sup>1906</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1780, fs.42v.

<sup>1907</sup> Firman el Sargento Marcos Agüero, los Cabos Jose de los Reyes y Mateo Chorroarín, y los soldados Tomás Fernández, Ipólito Avalos, Pedro Senteno, José Molina, Tomás Arias, Antonio Rodríguez, Pedro José Arroyo, Pedro Casavalle, Mariano de los Reyes, Andrés Silia, Eusebio Antonio Dueña, Francisco Correa, Manuel Rocha, Ramón Escalante y José Vicente Alarcón (AGN, Protocolos, Registro 5, 1793, fs.127v.).

<sup>1908</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.15.

<sup>1909</sup> *Idem*, fs.9. En la Compañía de Blandengues de Santa Fé "...el primer baqueano fué N. Saucedo, cautivo español rescatado; el segundo Faustino Casco, cautivo, baleado y sujetado en una expedición; el tercero Pablo Cardoso, también cautivo español rescatado; el cuarto Bentura Gaitán, soldado natural de Santa Fé; y el quinto y sexto, los actuales Asencio Salva y Agustín Acosta" (AGN, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.9).

<sup>1910</sup> *Idem*, fs.9v.

<sup>1911</sup> *Idem*, fs.9v.

<sup>1912</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.111, Exp.2645.

<sup>1913</sup> *Idem*.

---

<sup>1914</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.29.

<sup>1915</sup> *Ibídem*.

<sup>1916</sup> *Ibídem*.

<sup>1917</sup> Ver Saguier, 1992a, 1992b, y 1992c.

<sup>1918</sup> Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

<sup>1919</sup> Levaggi, 1986, 86.

<sup>1920</sup> El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la incuria e ignorancia de sus actuales autoridades.

<sup>1921</sup> De ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de ahora en más también conocida con las siglas CHF).

<sup>1922</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, este último identificado de ahora en más con las siglas A-CH.

<sup>1923</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>1924</sup> Hunefeldt, 1983, 4.

<sup>1925</sup> Levaggi, 1986.

<sup>1926</sup> Levaggi, 1971, 46; y 1986, 7-89; y Fisher, 1990, 641. Las fiestas de tabla eran obligatorias y las de devoción voluntarias (Buechler, 1989, 280). Asimismo, para TePaske (1970) y Mora Mérida (1983), la corona, mediante las Reformas Borbónicas, al desplazar los curas criollos hacía los curatos de campaña, y quitarles la Administración de los Pueblos de Indios, se enajenó la simpatía del clero (TePaske, 1970, 269-270; y Mora Mérida, 1983, 305).

<sup>1927</sup> Avellá Cháfer, 1981, 303.

<sup>1928</sup> Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente. Ver Ganster, 1993, 152.

<sup>1929</sup> Socolow, 1978, 103; y Levaggi, 1990, 43, nota 6.

<sup>1930</sup> Runciman (1983) concluye que en Francia "...ni la abolición de la venalidad de los

---

oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

<sup>1931</sup> Barnadas, 1984, 539.

<sup>1932</sup> Olaechea, 1992, 208-210.

<sup>1933</sup> Besio Moreno, 1939, 394.

<sup>1934</sup> Azara, 1850, 1982, 24; y Carbia, 1945, 27.

<sup>1935</sup> Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

<sup>1936</sup> Dicha investigación sería factible relevando el nombre de los curas registrados en los padrones de época publicados por la Facultad de Filosofía y Letras.

<sup>1937</sup> Corbellini, 1950, II, 213; y Ruiz Guñazú, 1952, 170-172.

<sup>1938</sup> Carbia, 1945, 214. Los otros nueve clérigos (Ferragut, Viola, Reyna Cáceres, Gainza Sánchez de Loria, Colina Oro, Rivarola Villa, Pereda Saravia, y Somellera Gutiérrez), si bien probablemente contaron en algún momento de su carrera eclesiástica con alguna congrua, por ser criollos descendientes de fundadores de capellanías, lo cierto era que con motivo de las guerras de Independencia sus ingresos provenientes de capellanías fundadas en bienes inmuebles urbanos habían decaído notoriamente.

<sup>1939</sup> El listado publicado por Levaggi (1986) en su Cuadro IV, nos provee la nómina de 39 beneficiarios; y los asientos de 63 partidas de la Caja de Amortizaciones de Buenos Aires, también publicados por Levaggi en sus Cuadros IX y X, nos provee los orígenes de las capellanías o patrimonios registradas a comienzos del siglo XIX.

<sup>1940</sup> A-CH, 1980, 313; y 1981, 290.

<sup>1941</sup> Peña, 1910, V, 193.

<sup>1942</sup> Acuerdos, III Serie, t.IX, 652-669. Debo esta referencia a la gentileza de nuestro dilecto amigo y colega Enrique Wedovoy.

<sup>1943</sup> hijo de Francisco de Villegas, natural de la Villa de Cofreses, Santander, y de María Fernández Machado (FB, VI, 283).

<sup>1944</sup> conocida también por evangelio.

<sup>1945</sup> conocida también por epístola.

<sup>1946</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, año 1792, fs.40v.

<sup>1947</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1793, fs.269v.

---

<sup>1948</sup> Para los que estudiaron en España, ver Martínez, 1985; para los que estudiaron en Charcas, ver Cutolo, 1963; y para los que estudiaron en Chile, ver Fuenzalida Grandón, 1972; y Lira Montt, 1979.

<sup>1949</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.75, Exp.1999.

<sup>1950</sup> *Ibidem*.

<sup>1951</sup> El sínodo era un ingreso correspondiente a un porcentaje de los tributos cobrados a los indios.

<sup>1952</sup> Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y hermano de Francisco Antonio, de Domingo y del Pbro. José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta.

<sup>1953</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v.

<sup>1954</sup> cuñado de Dn. Vicente Antonio Bustos, el que fuera padre del Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

<sup>1955</sup> Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

<sup>1956</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v. Amenazado Noroña por el Pbro. Ocampo con muchos capítulos "...de su infiel manejo desistieron del empeño y entraron en el de los informes al Reverendo Obispo, en procesar criminalmente a Dn. Juan Amaranto [Ocampo], y en incomodarme a mi [Francisco Antonio Ortiz de Ocampo] con la intempestiva exhibición de la parte correspondiente a las penas de Cámara en las multas que tenía exigidas como Alcalde del Partido" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v). Manuel de Noroña, hijo de Dn. Jose de Noroña y Losada, era terciarista en el Partido de Guandacol, donde "...la parte misma que producía la terciar se empleaba en queros de vicuña" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.38).

<sup>1957</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.46v. (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>1958</sup> *Ibidem*.

<sup>1959</sup> *Ibidem*. El Tridentino consiente la simultaneidad de beneficios únicamente tratándose de beneficios simples, no residenciales e incongruos.

<sup>1960</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, 1794, fs.345v.; Reg.3, 1817 fs. 140v.; y Reg. 3, 1820, fs. 81v.

<sup>1961</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, año 1760, fs.118v.; Registro 1, año 1794, fs.196; y Registro 3, año 1803, fs.449v.

- 
- <sup>1962</sup> Fasolino, 1963-65, 9. Para una descripción de la tonsura ver Ganster, 1993, 154.
- <sup>1963</sup> hijo de Andrés Paz de Codecido, natural de Santiago de Galicia, y de Manuela Durán y González Marín, y primo hermano del General José María Paz (FB, V, 148).
- <sup>1964</sup> hija del Alférez Real de Buenos Aires José González Marín y de María de Toledo y Ojeda, viuda de Miguel Antonio de Azuaga, y cuñada de Claudio Durán de Santa Cruz (FB, III, 265, y AGN, Protocolos, Registro 2, año 1762, fs.124v.).
- <sup>1965</sup> hijo del Capitán Pedro de Cueli y Lozano y de María Antonia de Garfías y Giles (FB, II, 181).
- <sup>1966</sup> marido de María del Carmen González del Pozo, hija de Simón González y de Teresa del Pozo (FB, II, 266).
- <sup>1967</sup> hijo de Simón González y San Martín y de Teresa Pozo y Garro, y cuñado de Mateo Chavarría (FB, III, 252; y V, 239).
- <sup>1968</sup> hija de Gabriel Giménez Naharro y de María Delgadillo, y viuda de Nicolás del Pozo y de Francisco Cors (FB, I, 223; y III, 186).
- <sup>1969</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1.
- <sup>1970</sup> *Ibidem*, fs.41v.
- <sup>1971</sup> *Ibidem*, fs.42v.
- <sup>1972</sup> *Ibidem*, fs.64.
- <sup>1973</sup> hijo de Juan Bautista Barón y de Antonia Paula del Pozo (FB, I, 223). Acerca de las aventuras de Pozo en Europa, ver Furlong, 1952, 470-476.
- <sup>1974</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1, fs.151.
- <sup>1975</sup> hijo del Capitán y Depositario General José de Esparza y de María Verdún y Villaysán (A-Ch, I, 105; y FB, VI, 258).
- <sup>1976</sup> A-Ch, 1983, I, 105.
- <sup>1977</sup> hijo del Capitán Eugenio Fretes Abalos de Mendoza y de María Esquivel y Palacios (A-Ch, I, 228).
- <sup>1978</sup> este delito se había generalizado en la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (Sarrailh, 1957, 630-631); y en el México colonial (González Marmolejo, 1982, 258-266).
- <sup>1979</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.19, Exp.522.
- <sup>1980</sup> hijo del Capitán Pedro de Suero y de Ana de Giles y Saavedra, y cuñado de Francisco de Herrera, Juan de la Cruz, José Larrisgoitia y Manuel Pérez de Bustamante

---

(FB, VI, 159).

<sup>1981</sup> Probst, 1946, 190, n.9.

<sup>1982</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.21, Exp. 584.

<sup>1983</sup> Este fué el caso de los curas Cayetano José Cires, Julián Joaquín Gainza, Luis José Madera, Antonio Gil Obligado, Marcos Salcedo y Félix José Pérez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg. 123, Exp.3106; Leg.124, Expedientes 3163 y 3164; y Leg.127, Exp.3210; Tribunales Administrativos, Leg.15, Exp.453; y Leg.16, Exp.498; e Interior, Leg.58, Exp.1.).

<sup>1984</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.137, Exp.3445.

<sup>1985</sup> consuegro de Juan Facundo Quiroga (FB, III, 102).

<sup>1986</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.54, Exp.1575.

<sup>1987</sup> *Ibidem*.

<sup>1988</sup> A-Ch, 1981, 296.

<sup>1989</sup> Sobre la Bula de Composición, ver Martínez de Sánchez (1995).

<sup>1990</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

<sup>1991</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

<sup>1992</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.

<sup>1993</sup> Sólo pude hallar dos capellanías, una a nombre de Juan Fernández de Agüero en 1792 y la otra a nombre de Manuel Luzuriaga en 1802 (La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires: Catálogo del Archivo de la Real Audiencia, 7.5.11.24; y 7.5.1.25).

<sup>1994</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.20, Exp.462.

<sup>1995</sup> *Ibidem*.

<sup>1996</sup> *Ibidem*.

<sup>1997</sup> Lavallé (1982) relata casos ocurridos en el Virreinato Peruano.

<sup>1998</sup> Lavallé, 1993, 162.

<sup>1999</sup> Los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco, Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, 3.000 indios y más del doble de mulatos, zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones gradualmente diezmadadas (ver Beltramini, 1978). Para la formación de los padrones

---

concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos, y aún los negros mismos" (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. Una de las indias de estos Pueblos fué la madre del poeta revolucionario y prócer de la independencia Cubana José Antonio Miralla).

<sup>2000</sup> hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de los Alcaldes José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán y Gregorio Arrascaeta (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>2001</sup> Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

<sup>2002</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>2003</sup> El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable (González Echenique, 1962, 186).

<sup>2004</sup> Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

<sup>2005</sup> Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

<sup>2006</sup> Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

<sup>2007</sup> Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

<sup>2008</sup> Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

<sup>2009</sup> Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de

---

Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

<sup>2010</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>2011</sup> plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

<sup>2012</sup> El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

<sup>2013</sup> Haslip-Viera, 1993, 351.

<sup>2014</sup> Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

<sup>2015</sup> La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

<sup>2016</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

<sup>2017</sup> Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>2018</sup> Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en

---

primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Según nuestro colega Diego Outes, este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>2019</sup> Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crimen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiola, un juicio por injurias (AHC, Crimen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

<sup>2020</sup> AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

<sup>2021</sup> Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona

---

Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios que anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador \$4.000; y éste, así por esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el capitaneazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>2022</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

<sup>2023</sup> Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

<sup>2024</sup> Enfrentada a la Casa de los Allende.

<sup>2025</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>2026</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>2027</sup> *Ibidem*.

<sup>2028</sup> *Ibidem*.

<sup>2029</sup> Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

---

<sup>2030</sup> Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>2031</sup> Buechler, 1989, 231-247.

<sup>2032</sup> AGN, Expedientes Administrativos, Tribunal de Cuentas, 1792-1806, Sala IX, 10-1-3.

<sup>2033</sup> Idem.

<sup>2034</sup> Idem.

<sup>2035</sup> Idem.

<sup>2036</sup> Idem.

<sup>2037</sup> Idem.

<sup>2038</sup> Idem.

<sup>2039</sup> Idem.

<sup>2040</sup> Idem.

<sup>2041</sup> Idem.

<sup>2042</sup> funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra *De Causis piis.*, editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282 y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título *De Causis Piis* está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatsbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P. Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis y al Dr. Domingo Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Este último me informa que del original no es posible sacar fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile la fotocopia". Es probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuita y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX como Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba.

---

Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que perteneciera al Convento de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

<sup>2043</sup> "...qua propter quoties pauper concurrat cum divite pariter idoneo in preferendus, qua in egeno non solum concurrat gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" (Oposición del Pbro. Dr. Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF, correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).

<sup>2044</sup> Idem.

<sup>2045</sup> Idem.

<sup>2046</sup> Idem.

<sup>2047</sup> Idem.

<sup>2048</sup> Idem.

<sup>2049</sup> Idem.

<sup>2050</sup> Idem.

<sup>2051</sup> Idem.

<sup>2052</sup> Idem.

<sup>2053</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

<sup>2054</sup> nacido en San Juan en 1751, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de Josefa Irrazábal, hermano del R.P. Anselmo Remigio Albarracín, sobrino de Miguel Albarracín y Balmaceda y de José Justo Albarracín y Domínguez (Verdaguer, 1931, I, 585).

<sup>2055</sup> cédula o despacho que dan los religiosos cuando los mudan de un convento a otro, o se les dá licencia de ir a alguna parte, para que conste de ella.

<sup>2056</sup> religioso que incurre en el vicio de propiedad, teniendo apego a los bienes temporales, o usando de ellos sin la debida facultad o licencia de su prelado.

<sup>2057</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

<sup>2058</sup> Ibídem.

<sup>2059</sup> Ibídem.

<sup>2060</sup> Ibídem.

---

<sup>2061</sup> *Ibidem*.

<sup>2062</sup> *Ibidem*.

<sup>2063</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

<sup>2064</sup> *Ibidem*.

<sup>2065</sup> *Ibidem*.

<sup>2066</sup> *Ibidem*.

<sup>2067</sup> La simonía segun derecho "...es reprobada y condenada por la universal Iglesia, de modo que siempre que se convence, contra cualesquiera persona eclesiástica el que vende cualesquiera cosa sagrada para usos profanos es castigado con las penas canónicas establecidas para la compurgación de este delito, y publico escarmiento. Para salvar pues los Teólogos católicos contra los herejes, que no hay simonía en la percepción de la limosna señalada por la Santa Bula, afirman, que el dar una cosa sagrada, por precio, para aplicarlo en otra cosa sagrada de que tiene necesidad la Iglesia, no es Simonía" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. B-5, Exp.6, fs.53). Ver Walzer, 1993, 108.

<sup>2068</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99).

<sup>2069</sup> Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99v.).

<sup>2070</sup> A-Ch, 1983, I, 82 y 110.

<sup>2071</sup> hermano carnal y correligionario político del gran comerciante Ambrosio Funes.

<sup>2072</sup> Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-IV-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.581, citado por Carbia, 1929, n.60, 529). Para la biografía de Videla del Pino, ver Piaggio, 1912.

<sup>2073</sup> Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-530; 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-503; y 61, 19-23.

<sup>2074</sup> Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-X-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.592, citado por Carbia, 1929, n.60, 529).

<sup>2075</sup> Adrián, 1991, 70, nota 16.

<sup>2076</sup> para la Bula de la Santa Cruzada del Paraguay, ver Pusineri Scala, 1992, 59-78.

<sup>2077</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1748/49, fs.141. A propósito de este cargo, en 1750 Antonio Candiotti, vecino de Santa Fé, se obligó con Rivadeneyra, por la cuantía que importó la partida de 800 bulas de vivos y 600 bulas de difuntos de a 2 tomines, 125 bulas de vivos y 80 bulas de difuntos de a peso ensayado, 6 bulas de vivos de a \$2, 6 bulas de composición de a 12 reales, y 2 licencias de capilla de a \$20 y dos de a \$11 pesos (AGN,

---

Protocolos, Registro 5, 1748-50, fs.282).

<sup>2078</sup> Hunefeldt, 1983, 4.

<sup>2079</sup> Ver Saguier, 1992a, 1992b, 1994, 1995a y 1995b.

<sup>2080</sup> Schwaller, 1985, 121.

<sup>2081</sup> Bazant, 1984, 198.

<sup>2082</sup> de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF) perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del infatigable y esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente no se han microfilmado los Libros de Capellanías de los obispados de Tucumán, Mendoza y Santa Fé.

<sup>2083</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>2084</sup> Sánchez Bella, 1986.

<sup>2085</sup> citado por Quiróz, 1993, 36.

<sup>2086</sup> Los censos y capellanías sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban \$322.418; y redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio del 4% anual, \$12.896 (Burga, 1979, 82).

<sup>2087</sup> ver Muñoz y Robles (1993).

<sup>2088</sup> Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y obras pías estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones en efectivo o en inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo XVI (Bauer, 1971, 78-82).

<sup>2089</sup> Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

<sup>2090</sup> Bauer, 1983, 732.

<sup>2091</sup> Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de Cervantes Bello (1986).

<sup>2092</sup> Lamentablemente, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia económica de las capellanías con respecto a los mercados inmobiliarios urbano y rural porteño, hasta tanto no hayamos reconstruido por medios informáticos, para cada época

---

histórica, los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando la totalidad de las compra-ventas de inmuebles registrados notarialmente.

<sup>2093</sup> Isern, 1936, 82.

<sup>2094</sup> Isern, 1936, 82.

<sup>2095</sup> Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre 1796 y 1816 (Pivel Devoto, 1964, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron capellanías y 176 censos. De las 11 capellanías dos fueron registradas en 1797, una en 1798 y 1801 respectivamente, dos en 1803, 1804 y 1808, y una sólo en 1810. De las mismas 11 capellanías registradas, una se afincó en una chacra, tres en fincas, y el resto en casas de Montevideo.

<sup>2096</sup> Goebel, 1938, 309.

<sup>2097</sup> Michael Costeloe trae para todo México a comienzos del siglo XIX una lista de 10.000 capellanías, que a un promedio de \$3.500 cada una totalizaron la suma de \$35.000.000 (Bauer, 1983, 717).

<sup>2098</sup> Marcos Rodríguez de Figueroa.

<sup>2099</sup> Manuel Antonio de Castro y Careaga y Francisco Salvio Marull.

<sup>2100</sup> Juan B. Maciel y Fermín de Pessoa.

<sup>2101</sup> Juan de Lezica y Torrezuri, María Bernarda Lezica de Seguroola, Lorenzo Lóyzaga, Alfonso Rodríguez, Manuel Rodríguez de la Vega y Gaspar de Santa Coloma.

<sup>2102</sup> José Cano Cortés, José Díaz, Simón González de Leyva, Bartolomé Márquez y Francisco de los Ríos y Gutiérrez.

<sup>2103</sup> hijo del Capitán y Justicia Mayor Diego Rodríguez de Figueroa y de Petronila de Cervantes (FB, V, 381).

<sup>2104</sup> Ver Tabla D-III.

<sup>2105</sup> Amén de las capellanías que fundó en Buenos Aires, Rodríguez de la Vega fundó en España una capellanía por \$40.000 a favor de una hermita y escuela de niños en su lugar de Barsenas (AGN, Protocolos, Registro 6, 1779, fs.270).

<sup>2106</sup> ver Saguier, 1993, 27 y Tabla C-V.

<sup>2107</sup> Socolow, 1978, 97 y 98.

<sup>2108</sup> hijo de Juan Antonio de Lezica y de Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho, y apoderado de su tío, el Pbro. Bernabé Santiago de la Torre (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, "Andrés Lezica, s/capellanía", fs.12).

<sup>2109</sup> hija de Bernabé de la Torre de Trassierra, nacido en Asturias, Gobernador de

---

Huancavelica, Perú; y de Petrona Eugenia de Tagle Bracho; y prima hermana de Ana María Velasco y Tagle Bracho, mujer del Capitán Martín Antonio Barquin (FB, VI, 165, 190 y 250).

<sup>2110</sup> Andrés Lezica alegaba que si se presentó en juicio contra su madre "...no fué por algún efecto de rencor o enemistad que encubriese en mi pecho, y sí sólo por el fin de aclarar, tanto lo conducente a mi honor y estimación, cuanto lo perteneciente a mi derecho y justicia" (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, fs.12; y Leg. L-14).

<sup>2111</sup> hija de Juan José de las Llagas Lezica y de Petrona de Vera Pintado (FB, IV, 143).

<sup>2112</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.L, n.22, "Lezica, María Manuela s/Capellanía". Los ordenanzas del AGN no han podido localizar este legajo.

<sup>2113</sup> AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, tomo 72, f.306 y 800v.

<sup>2114</sup> Rázori, 1945, 245.

<sup>2115</sup> Calvo, 1924, 164.

<sup>2116</sup> Ver Tabla D-III.

<sup>2117</sup> nacido en Chile, hijo del Sargento Mayor Gerónimo del Pozo y Silva y de Constanza de Lemos; y marido de Ana María de Garro (FB, V, 239).

<sup>2118</sup> hijo de Alonso del Pozo y Silva y de Ana María de Garro (FB, V, 239).

<sup>2119</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.108.

<sup>2120</sup> AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 46, fs.151v.

<sup>2121</sup> AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 65, fs.737. El patronato de esta capellanía fué reclamada por Lorenza de Acasuso, hija o nieta de Domingo de Acasuso, a Damiana de los Heros y Acasuso, hija de Antonio de los Heros y Acasuso y de María Josefa Jofré de Arce y Videla, por ante el Juez Metropolitano de la Ciudad de La Plata (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1770/71, fs.140).

<sup>2122</sup> Levaggi, 1986, 86.

<sup>2123</sup> "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en

---

Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).

<sup>2124</sup> Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre 1796 y 1816 (Pivel Devoto, 194, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron capellanías y 176 censos.

<sup>2125</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>2126</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>2127</sup> Goebel, 1938, 309.

<sup>2128</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>2129</sup> Maeder, 1981, 314.

<sup>2130</sup> Es el caso de las capellanías de Manuel de Abila, José Alcina, Isabel de Antas Martel, Vicente Arozarena, Pantaleón Rivarola, Rodrigo Sánchez de Bonilla, Gregorio de Brito, José Monsalve, María de Ayala, Pedro Sánchez Rendón, Deán Francisco de Saldívar, Santiago Rocha, Bartolomé de la Mata, Francisco Caballero Bazán, Juan de Eguía, Dominga de Ibarra, Gerónimo Sarachi y Ordóñez, Francisca Miranda, Fr. Cristóbal de la Mancha, Domingo García Moya, y Duarte Rodríguez de Estela.

<sup>2131</sup> Martínez López-Cano, 1994, 30.

<sup>2132</sup> AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs. 181v. y 177

<sup>2133</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1733, fs.119.

<sup>2134</sup> AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.89.

<sup>2135</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. M-5, "Estéban José Moreno c/Josefa Peña, s/ capellanía".

<sup>2136</sup> hijo de Blas Gazcón y de María Tomasa de Arze, y marido de María Manuela López García, hija de Francisco López García y de María Ventura Morales y Toscano (FB, III, 163; y IV, 15).

<sup>2137</sup> *Ibidem*.

<sup>2138</sup> *Ibidem*.

<sup>2139</sup> *Ibidem*.

<sup>2140</sup> Udaondo, 1949, 126, citado por Levaggi, 1974, 389.

<sup>2141</sup> AGN, División Colonia, Asuntos Legales, Buenos Aires, 1780-82, Sala IX, 11-1-6.

<sup>2142</sup> *Idem*.

---

<sup>2143</sup> sobre el rol de las Hermandades en los entierros celebrados en Brasil, ver Queiroz, 1989; y Theije, 1990.

<sup>2144</sup> Peñarrubia era natural de Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; casado en primeras nupcias con Camila Prudencio Pérez, hija de Pedro Prudencio Pérez (Buechler, 1989, II, 343, nota 245); y en segundas nupcias con Juana Guriguru; hermana de Juana Guriguru, mujer del Teniente de Dragones Pedro Escribano Salvado, también nacido en Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; y el mismo era tío político del Capitán de Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de Pedro Escribano Salvado y de María Guriguru o Burburu; del Alférez del Presidio Cayetano Grimau, casado en primeras nupcias con María Antonia Escribano Guriguru, y en segundas nupcias con María Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycoechea; y de Mercedes, mujer del Ministro Contador de la Factoría de Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59; y FB, 1986-90, II, 293; y III, 195 y 288).

<sup>2145</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59.

<sup>2146</sup> "...Deinde census sol vendus est in specie monet de qua conventur, etiamsi usus valor tempore solutionis, auctus vel deminutus sit" Murillo, Libro 3, Decretali m. tit.39 De censibus, y Alvarez, in Tit. de cens., n.983, citados en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 y 29v. (Microfilm 2677, del CHF).

<sup>2147</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 (Microfilm 2677, del CHF).

<sup>2148</sup> *Ibidem*.

<sup>2149</sup> *Idem*, fs. 29v.

<sup>2150</sup> *Idem*.

<sup>2151</sup> "...alio quim parum distaret a mutuante sub usuris, qui sortem mutuatam in omnem eventum se curam habet" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.29v. [Microfilm 2677, del CHF]).

<sup>2152</sup> "...secus tamem sit Herilitas non sit...que ademat omnem pror sus spem, quod aliquo tempore possit aliquos fructos reddere, sed si temporalis, ita ut per aliquos annos fundus ille non ferat vel nonnullos vel tan exiguos fructus ferat qui non sufficiant pro solutione totus census, co enim casu censum, non estingui vicendum est, sive hoc contingat caso fortuito, sive culpa et negligentia domini fundi supositi nam cum utroque casu re ipsa censuata remaneat de sui natura apta ut aliquo tempore fructus ferat census non potest dice extintus" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.46v. [Microfilm 2677, del CHF]).

<sup>2153</sup> *Idem*.

<sup>2154</sup> viuda de Francisco Antonio Ferrera Feo, tutora de su hijo Juan Mariano Ferrera (FB, III, 54).

<sup>2155</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 1, fs. 77.

---

<sup>2156</sup> hija de Domingo de Irazusta y Orozco y de Juana Tomasa de Malaver (FB, IV, 63).

<sup>2157</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.I-4, Exp.14, fs.412.

<sup>2158</sup> Idem.

<sup>2159</sup> FB, V, 210.

<sup>2160</sup> hijo de Francisco González de la Cotería y de María Anastasia Gorostizú (FB, III, 263).

<sup>2161</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.360v.

<sup>2162</sup> Ibidem.

<sup>2163</sup> Ver Molina, 1991, 70.

<sup>2164</sup> AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

<sup>2165</sup> Ibidem.

<sup>2166</sup> Ibidem.

<sup>2167</sup> ver Molina, 1991, 71.

<sup>2168</sup> ver Molina, 1991, 71.

<sup>2169</sup> AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

<sup>2170</sup> Ibidem.

<sup>2171</sup> Ibidem.

<sup>2172</sup> Larrea (1626, 1732) decía: Quoties juramento obligatio mulieris confirmetur est comunies opinio, ut licet mulier maneat indotata, adhuc contractus firmatum debet obtinere.

<sup>2173</sup> AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

<sup>2174</sup> Ibidem.

<sup>2175</sup> Ver Molina, 1991, 70.

<sup>2176</sup> Pereira decía: Ultimo concludam, quod si post venditionem celebratan aliqui superveniant actus, exquibus apareat mulierem vere concenssisse venditioni; metus utique purgatus censebitur, nam si potem; et valens reclamare tacuerit, vel actum positivum

---

fecerint pratedentis contractus approvationis, utique jam censetur omnis coactio abberse, et ratificatur, quod ab initio gestum est. Las obras de Cepolla fueron comentadas por los canonistas Gualterio Copinger y Juan Federico Schulte.

<sup>2177</sup> AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

<sup>2178</sup> nacido en Córdoba, hijo de Gonzalo de Peralta y de Ana de Fuentes (FB, III, 96).

<sup>2179</sup> Avellá Cháfer, 1983, I, 30.

<sup>2180</sup> FB, V, 298.

<sup>2181</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.F-3, Exp.13, fs.45v.

<sup>2182</sup> Las tasaciones solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu dotó a su hijo Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que prescribía para la pared de cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4 reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de grueso, a 2 reales vara; y para la pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN, Protocolos, Registro 3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de 1800 la casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó una tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la pared sencilla de ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el texado con cañas y texas, 2 reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara; la vereda a la calle, 2 reales vara; y una parra \$4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años mas tarde, en 1806, los herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el barrio de Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido estaba en ese año a 7 reales vara, un real más caro que en 1800, o sea con un 15% de aumento; el texado con texas y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara (AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

<sup>2183</sup> Debo esta observación a la gentileza del Dr. Carlos A. Mayo.

<sup>2184</sup> Los albaceas de Josefa Rodríguez Flores, viuda de Andrés Vivas, vendieron en 1792 a Jayme Alcina una casa en el barrio de la Catedral en \$12.000, que Vivas había adquirido en 1762 al gran comerciante registrero Manuel del Arco, la cual incluía tres gravámenes distintos: \$2.000 de la capellanía impuesta por el comerciante Eugenio Lerdo de Tejada, que la servía el Pbro. Judas Tadeo Poveda; \$2.500 tomados a censo en 1789 a favor de las Temporalidades; y \$1.000 tomados en 1786 de Bartola de Arce (AGN, Protocolos, Registro 6, 1792, fs.49v.). Antonio Romero de Tejada vendió en 1798 a Pedro José de Ballesteros y Francisca Fermosel unas casas a espaldas del Colegio de San Carlos, que habían sido adquiridas al Conde de Torre Tagle Francisco Sanginés, las cuales reconocían \$5.500 en censos y \$6.500 en tres capellanías de coro de la Catedral, de las que era Patrono el Deán de la misma, y que servían los Presbíteros Juan Manuel de Zavala y Juan Bautista Goiburu (AGN, Protocolos, Registro 2, 1798, fs.151 a 182; y Registro 2, 1802, fs.490). En 1799 el comerciante Pablo Tompson vendió a Manuel José de Ocampo y

---

Navia, originario de Arequipa, "la casa grande" en la calle de San Pedro en \$13.341, de los cuales \$4.000 pertenecían al Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba, y \$2.000 pertenecían a la capellanía fundada en 1783 por Manuel Rodríguez de la Vega a favor del Hospital Betlemítico (Mayo, 1991, 153-157), que servía el Pbro. Felipe José de Maqueda (AGN, Protocolos, Registro 3, 1799, fs.220). El mismo año, el albacea de Faustino Ortiz vendió a José de Echevarría y Medinaveitía una casa en \$7.000, la cual reconocía tres gravámenes distintos: 1) un censo de \$1.500 a favor del Dr. Fabián Aldao; 2) \$1.000 al Convento de San Francisco; y 3) \$1.000 al Convento de las Monjas Catalinas (AGN, Protocolos, Registro 1, 1799, fs.419). Un año después, en 1800, el Presbítero Juan Antonio Delgado vendió al escribano Juan José de Rocha una casa en \$10.300, que incluían tres capellanías: 1) \$900 que pertenecían a la capellanía de Diego López; 2) \$1.400 a la capellanía del Pbro. Carlos Rubio; y 3) \$4.000 a la capellanía que el mismo vendedor fundara en 1798 (AGN, Protocolos, Registro 1, 1800, fs.122v.). Otro año después, en 1801, los herederos de Juan Cabezas vendieron a Josefa Gabriela Lazcano y García de Zúñiga, viuda de Juan José Núñez, una casa en \$5.250, de los cuales \$2.000 pertenecían a la Santa Iglesia Catedral, \$1.000 al Convento de Santo Domingo, y \$600 al Convento Betlemítico (AGN, Protocolos, Registro 1, 1801, fs.291v.). El célebre comerciante Tomás Antonio Romero vendió en 1804 a Bernardo Lecoq una casa en la calle del Pino en \$15.000, a excepción de \$2.910 que estaban fincados a favor de las Temporalidades y \$2.000 a favor de la capellanía que fundara en 1789 Félix de Zuloaga, albacea de José Antonio Gutiérrez, la cual a su vez había estado instituida a favor del Dr. Mariano Medrano (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.1). El mismo año de 1804, el Dr. Francisco Bruno de Rivarola, abogado de la Real Audiencia, vendió a Juan Manuel Marín una casa en el barrio de la Merced en \$3.500, que incluían dos capellanías de \$1.000 cada una, pertenecientes al Convento de la Merced, y otros \$1.000 a favor de la capellanía que fundara Mariana Ruiz de Bolaños, que había recaído en el Pbro. Estanislao de la Mata (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.86). El Dr. Juan José Castelli vendió en 1806 y 1808 a Camilo Juliá y Viñals y a Antonio de las Cagigas sendas casas en la calle de las Torres, en \$10.000 cada una, que hubo su padre Angel Casteli por compra a Antonio Parraga, las cuales incluían seis gravámenes distintos: 1) \$3.000 a favor de la Capellanía fundada por Francisco X. Aspiázu; 2) \$1.000 a favor del Convento de Santo Domingo del Paraguay; 3) \$700 a favor del Convento de San Francisco de Santa Fé; 4) \$1.000 a favor del Ramo de Temporalidades; 5) \$2.000 a favor de los herederos de Francisco Segurola; y 6) \$500 a favor de los hijos menores de Manuel Joaquín de Zapiola (AGN, Protocolos, Registro 3, 1808, fs.346v.; y Registro 1, 1804/09, fs.239v.). La casa de José Manuel Estrada, situada en la calle Chacabuco esquina San Francisco, reconocía tres capellanías: la primera de \$2.000, cuyo Patrono era la Madre Rectora de la Casa de Ejercicios Doña Justa Rufina Díaz; la segunda de \$905, perteneciente a las Monjas Teresas de Córdoba; y la tercera de \$4.000, cuyo patronato pertenecía a José Manuel Estrada, por muerte de su madre Carlota Barquin (hija del Capitán de Milicias Martín Antonio Barquin y de Ana María Velasco y Tagle Bracho, FB, I, 223), viuda de Juan B. Estrada (AGN, Tribunal Civil, Leg.E-27, "Estrada, José Manuel y Juan Martín, p/redención de capellanía", fs.29).

<sup>2185</sup> Pedro de Lezica hizo el traspaso de su casa, en el barrio de la Piedad, a Bernardo Castañón, en 1812, sin precio alguno, habiéndola comprado en 1810 al Pbro. Manuel Antonio de Castro y Careaga en \$4.000 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1812, fs.87v.).

<sup>2186</sup> ver Saguier, 1993, 20-21. En 1708, veinticinco años después que el Capitán Francisco Gil adquiriera del Convento de Santo Domingo una chacra en el pago de la

---

Costa, con el compromiso de abonar los réditos de una capellanía de \$500 de principal, que fundara en 1662 Ana de Burgos, viuda de Fr. Diego Serrano, resolvió por presión del Convento hacer dejación de la chacra, en virtud de no poder pagar sus corridos (AGN, Protocolos, Registro 2, año 1708, fs.241). Dieciocho años después, en 1726, habiendo Antonio de Indá adquirido una chacra en el pago de las Conchas, con el compromiso de pagar los réditos de un principal de \$325 fundado por Rodrigo Sánchez de Bonilla, a favor del Convento de San Francisco, declaró también por presión de este último hacer dejación de la misma (AGN, Protocolos, Registro 3, año 1726, fs.729v.). En 1763, el Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Córdoba ejecutó y embargó una chacra ubicada en el pago de las Conchas, propiedad de Josefa Moreno, viuda de Francisco Miranda, por no abonar los corridos de \$600 de principal, fundados en 1757 y 1758 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1763, fs.147). Una década mas tarde, en 1772, Josefa Ossorio, viuda de Francisco Rodríguez, se vió precisada a vender a Vicente Azcuénaga una chacra en San Isidro, que obtuviera por donación de Juan de Ansaldo y Dongo, por no tener como pagar los réditos atrasados de \$1.000 de principal, que sobre sí tenía dicha chacra desde 1725 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1772, fs.58).

<sup>2187</sup> Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

<sup>2188</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

<sup>2189</sup> Idem.

<sup>2190</sup> Idem.

<sup>2191</sup> Ibídem.

<sup>2192</sup> Ibídem.

<sup>2193</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

<sup>2194</sup> Idem, fs. 22v.

<sup>2195</sup> Idem, fs. 23

<sup>2196</sup> Idem, fs. 23.

<sup>2197</sup> Idem.

<sup>2198</sup> Idem, fs. 24v.

<sup>2199</sup> para una crítica de Genovesi, ver Zambelli, 1978.

<sup>2200</sup> Roll, 1942, 71; Schumpeter, 1984, 306; y Heckscher, 1943, 615,645.

<sup>2201</sup> Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 89.).

<sup>2202</sup> Idem, fs. 89v.

- 
- <sup>2203</sup> Idem, fs. 90.
- <sup>2204</sup> Idem, fs. 90v.
- <sup>2205</sup> Idem,
- <sup>2206</sup> Idem, fs. 91.
- <sup>2207</sup> Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.
- <sup>2208</sup> Socolow, 1987, 106.
- <sup>2209</sup> ver Ullmann, 1985, 249, 252 y 254.
- <sup>2210</sup> eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos a propuesta de los obispos, para calificar la ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. No podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de maestro, doctor o licenciado en Teología o Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56, p.650).
- <sup>2211</sup> tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y revalidar beneficios mal adquiridos.
- <sup>2212</sup> Ravignani, 1937, I, 49.
- <sup>2213</sup> Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.
- <sup>2214</sup> El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, citado en Cabral Texo, 1952, 100.
- <sup>2215</sup> Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos.
- <sup>2216</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 149-150.
- <sup>2217</sup> Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.
- <sup>2218</sup> Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952, 1958 y 1960.
- <sup>2219</sup> Ver Martínez Peroni, 1983, 455-490.
- <sup>2220</sup> Para Joaquín V. González, los Cabildos, al haber sabido resistir la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro" (González, 1888, Libro Primero, II).
- <sup>2221</sup> Según ellos, los Cabildos resistieron la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores desde los mismos comienzos de la dominación colonial, en los siglos XVI y XVII. En ese sentido, los que influidos por el germanismo de Thierry y Guizot, sostuvieron la tesis de que en la génesis del estado colonial le cabía la prioridad a las provincias por sobre la nación, en realidad lo que hacían era atribuir el origen de la nacionalidad a los Cabildos. Al lamentarse que en la Argentina Independiente no se hubieran dejado en pie los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, lo que en realidad añoraban era el "republicanismo" colonial Habsburgo --erosionado por el discurso Reformista Borbónico y demolido por el discurso Revolucionario.
- <sup>2222</sup> como Montes de Oca (1897), García (1900), Rivarola (1908), Matienzo (1910), Levillier (1912),

---

Ingenieros (1918), Bas (1927), Ravignani (1938), Bagú (1952) y Levene (1911).

<sup>2223</sup> Al referirse a la base social del estado colonial, dichos autores sostuvieron que en aquellos tiempos, en las corporaciones de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, existieron aristocracias o patriciados (equivalentes a la nobleza de la modernidad absolutista Europea), y no clases medias (equivalentes a la burguesía), únicos sostenes posibles de repúblicas democráticas.

<sup>2224</sup> García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier, 1984a, 24.

<sup>2225</sup> En los Estados Unidos, a partir de la obra de Wood (1992, 1994) y en Canadá a partir de las obras de Groulx (1936, 1952, 1956); Frégault (1944, 1955); Brunet (1964, 1969); Séguin (1968); y Wallot (1973), reseñadas por Ouellet (1981).

<sup>2226</sup> distinguimos para la vigencia de los fueros aquellas ciudades e instituciones donde prevalecía la venalidad y heredabilidad de los cargos públicos de aquellas otras ciudades e instituciones donde prevalecía la elegibilidad de los mismos. Lo que definía la constitución patrimonialista de los estados coloniales de la modernidad absolutista eran las diversas políticas respecto al reclutamiento y promoción de los funcionarios públicos (subastas de oficios públicos versus burocracia real asalariada).

<sup>2227</sup> probablemente inspirados en Tocqueville (1859), Tönnies (1887) y Weber (1922).

<sup>2228</sup> Luxemburg, 1908, 1979, 81-139; Rivarola, 1941, 21; y Kofler, 1974, 332.

<sup>2229</sup> Levillier, 1912, 81-83; Ingenieros, 1918, 38-41; y Puiggrós, 1940. Ver Saguier, 1984, 24.

<sup>2230</sup> Puiggrós, 1940, 56, nota 91.

<sup>2231</sup> Phelan, 1967, 327; y Zabludovsky, 1986.

<sup>2232</sup> Beneyto, 1961, 117.

<sup>2233</sup> Phelan, 1967, 324.

<sup>2234</sup> Peña, 1970.

<sup>2235</sup> Esta tendencia visualizó a los conflictos en el seno de los concejos municipales coloniales (Vicuña versus Vascongados en Potosí, Beneméritos versus Confederados en Buenos Aires, pelucones versus anti-beatos en San Juan, ajesuitados y anti-jesuitas en Corrientes) como verdaderas luchas inter-capitalistas.

<sup>2236</sup> Lynch, 1967, 191; y Kaplan, 1976, 74.

<sup>2237</sup> No obstante su condición de miembros de un estamento, los vecinos encomenderos revelarían --en los conciertos de indios celebrados entre regiones geográficamente apartadas entre sí-- la existencia de una intensa movilidad, estrecha interdependencia y capacidad de transformarse en hacendados (permítaseme citar a Saguier, 1993).

<sup>2238</sup> Peña, 1983.

<sup>2239</sup> como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de México; y para Martínez Ortega (1989,1992) y González Muñoz (1992), quienes analizan la elite Yucateca.

<sup>2240</sup> Martínez Ortega, 1989, 216. Sherman (1977, 1980) y Williams (1988) reconocen a partir de la sociobiología la importancia que el rol del nepotismo tiene en el género animal (Williams, 1988, 384 y 397). Sherman (1977) demuestra en un gran número de especies sociales que los parientes más próximos reciben una mayor ayuda (Reiss, 1984, 123). Las relaciones de parentesco entre los seres humanos surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y

paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechársele incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elías (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elías, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

<sup>2241</sup> no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

<sup>2242</sup> González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112.

<sup>2243</sup> Solo aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968); y para la enumeración de los privilegios que otorgaba la vecindad ver Lorenzo Schiaffino (1984).

---

<sup>2244</sup> Pagden, 1997, 191.

<sup>2245</sup> Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). Este sistema, equivalía en la práctica a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. La partición de los oficios públicos, o discriminación preferencial de los oficios públicos, tiene sus antecedentes en el siglo XVII en los Cabildos seculares cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383), y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955; González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166). Esta política discriminatoria, semejante al Programa impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías étnicas y conocido con el título de Acción Afirmativa, fomentó el estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades de la América Hispana a percibir a los peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa sumergió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su desproporcionadamente inferior cuota de poder como fruto de una culpa (Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver Reynolds, 1992; y Lipset, 1992).

<sup>2246</sup> Dispensa o concesión de facultades, títulos o privilegios que se otorgan por el Rey o el Papa mediante ciertos servicios pecuniarios (Escriche, 1863, 752). Ver asimismo a Cortés, 1978. El Sargento Mayor José Cañete, hijo bastardo del Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, y padre del célebre escritor Pedro Vicente Cañete y Domínguez, fué legitimado por el Rey (Quevedo, 1984, 77). El escribano Juan José Rocha, mulato, adquirió en 1797 en Buenos Aires una gracias al sacar, que le permitió ser llamado Don (Socolow, 1987, 106).

<sup>2247</sup> El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación.

<sup>2248</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 4.

<sup>2249</sup> Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación, y Real Ordenanza de Intendentes, 1784.

<sup>2250</sup> Romero, 1956, 54-55; Véliz, 1984, 87; y Sanjurjo, 1987, 531.

<sup>2251</sup> Comadrán Ruiz, 1959, 82; Acevedo, 1965, 127, 186-187, y 505; y Fisher, 1981, 201. Según Fernandez Alonso (1991), tanto Moore como Lynch y Comadrán Ruiz sostienen, a diferencia de Fisher y Acevedo, que la intervención de los Gobernadores-Intendentes supuso una grave pérdida de terreno para los Cabildos (Fernández Alonso, 1991, 518).

<sup>2252</sup> Acevedo, 1965, 187.

<sup>2253</sup> Fisher, 1981, 201.

<sup>2254</sup> Socolow, 1987, 160.

<sup>2255</sup> No es de descartar que el régimen patrimonial se perpetuara aún luego de la Revolución si tenemos en cuenta que aún en Francia, pese a la Revolución, Runciman (1983) concluye que "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

<sup>2256</sup> Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141.

<sup>2257</sup> Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128.

<sup>2258</sup> fundados implícitamente en los juicios de Weber (1922); Kofler (1948, 1974) y Anderson (1974) en sus aportes acerca de la venta de cargos; y Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizaron el Perú colonial tardío.

---

<sup>2259</sup> Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

<sup>2260</sup> Sánchez Bella, 1989, 447.

<sup>2261</sup> Moreno Cebrián, 1976, 228.

<sup>2262</sup> Parry, 1953, 33-47, citado por Lynch, 1967, 216, nota 8. La innovación de hacer a los oficios vendibles también renunciabiles fué copiada aparentemente de Francia, donde por el procedimiento ideado por Paulet los oficios vendibles "...se volvían hereditarios por un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra, medida destinada a aislar a la burocracia de la influencia de los potentados" (Anderson, 1979, 91).

<sup>2263</sup> Golte, 1980, 206.

<sup>2264</sup> Choy, 1985, 206.

<sup>2265</sup> Botana, 1991, 92.

<sup>2266</sup> Fernández, 1973, 1985, 196-197.

<sup>2267</sup> cuyos síntomas fueron: 1) la utilización de la campaña del hinterland como ámbito de residencia alternativa por parte de las élites locales; 2) el avance progresivo de las actividades artesanales; 3) la tugurización de las áreas urbanas centrales (plaza de armas); y 4) la escasez de recursos infraestructurales (Vives, 1986, 70).

<sup>2268</sup> Domínguez, 1985, 98; y Robinson y Thomas, 1974, 32. Debo la referencia de este último autor a la gentileza del Profesor Carlos A. Mayo.

<sup>2269</sup> y a diferencia de los puntos de vista funcionalistas de Eisenstadt (1969) y Mardin (1973) y los criterios de clase de Mann (1984), que plantearon la inevitabilidad del conflicto entre los centros y las periferias.

<sup>2270</sup> Salzmann, 1993, 394.

<sup>2271</sup> Saguier, 1984a.

<sup>2272</sup> Saguier, 1984b, 48-59.

<sup>2273</sup> Saguier, 1984b, 51. Ultimamente, Fradkin (1987), reanudando una tesis de Ingenieros (1900) y de Beneyto (1961), incorpora a los análisis acerca de la crisis del estado colonial el rol que en dicha crisis les cupo a las corporaciones. Para Fradkin, el pasaje de gremio corporativo a clase social encuentra en el estado colonial límites que comienzan a superarse recién en el estado autocrático, y que sólo se resuelven en el estado oligárquico. Como el status de los individuos que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Fradkin, con el status mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación potencialmente crítica. Finalmente, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente.

<sup>2274</sup> designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y control de la educación superior.

<sup>2275</sup> privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso.

<sup>2276</sup> El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, citado en Cabral Texo, 1952, 100.

---

<sup>2277</sup> Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos.

<sup>2278</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 149-150.

<sup>2279</sup> Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.219.

<sup>2280</sup> Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.206, 216 y 219. Ver Sáenz Valiente, 1910, 10; Cabral Texo, 1952, 100; Díaz, 1952, 19, nota 4; y Mouchet, 1960, 29.

<sup>2281</sup> Registro Oficial de la República Argentina, II, 1822-1852, p.41, citado por Rivarola, 1934, 241; y Cabral Texo, 1952, 104-107. Ver también Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

<sup>2282</sup> Linares Quintana, 1956, III, 475ss.

<sup>2283</sup> Giddens, 1977, 274.

<sup>2284</sup> Levaggi, 1971, 45.

<sup>2285</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 4.

<sup>2286</sup> Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

<sup>2287</sup> proveer de curatos y beneficios, declarar sedes vacantes, laudar en litigios eclesiásticos, concursar canongías, y supervisar y controlar la educación superior.

<sup>2288</sup> recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez de la jurisdicción eclesiástica para que disponga que este último alce la fuerza o violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su propia declinatoria.

<sup>2289</sup> Vicente y Caravantes, I, 295. En la Francia y la España de la modernidad absolutista esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030).

<sup>2290</sup> Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que se inhíba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668; y Vicente y Caravantes, II, 79).

<sup>2291</sup> Lynch, 1958, 212; y Saguier, 1991a.

<sup>2292</sup> Saguier, 1991b.

<sup>2293</sup> fué introducida por vez primera en el Concilio de Letrán de 1213 (Silva, 1968, 1030).

<sup>2294</sup> Silva, 1968, 1030.

<sup>2295</sup> Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97.

<sup>2296</sup> Que operaba al igual que una inhibitoria pues sustraía al reo de la jurisdicción ordinaria. El Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas de La Rioja Vicente Antonio Bustos, cuñado del Receptor de Alcabalas José Pascual de San Román y Castro, ligado a los intereses mineros de Chilecito, se había tomado la facultad en 1799 de revestir a Don Nicolás Bazán, con el título de Capitán de Milicias "...para que a la sombra de este aparente fuero [militar] tuviese un motivo para negarse a la obediencia y reconocimiento de la jurisdicción de [Francisco Antonio Ortiz de] Ocampo" (AGN, División Colonia,

---

Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2). Para el fuero militar, ver Cabral Texo, 1952, 91-126; Díaz, 1952, 18-33; Tanzi, 1969, 236-243; Levaggi, 1971, 44-91; y Domínguez, 1985, 88.

<sup>2297</sup> AGN, Tribunales, Sucesión 3909, Testamentaria de Domingo de Acasuso, fs.21. Por auto proveído en 14-V-1670 se mandó que todos los Ministros de Cruzada de las cabezas de partidos, "...sólo los propietarios, con oficios comprados, hubiesen de gozar de los fueros, privilegios y excepciones que por sus títulos les fuesen concedidos, sino en las causas tocantes al ejercicio y Ministerio de la Santa Bula; pero no en lo que morase como a personas particulares en las deudas que tuviesen, y delitos que cometiesen" (Idem).

<sup>2298</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>2299</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

<sup>2300</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.59.

<sup>2301</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.85.

<sup>2302</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.15.

<sup>2303</sup> Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21).

<sup>2304</sup> Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8 de marzo de 1838, 20-27; t.23, n.588, 9 de marzo de 1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36.

<sup>2305</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971, 164-205.

<sup>2306</sup> Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1981) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

<sup>2307</sup> Pike, 1958, 144.

---

<sup>2308</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 7.

<sup>2309</sup> Buechler, 1989, 19 y 340.

<sup>2310</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

<sup>2311</sup> Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; conuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes (FB, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

<sup>2312</sup> Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2).

<sup>2313</sup> Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y conuñado de Pascual Mariano Basallo (FB, I, 98; y III, 171; y JR, 1989, ítem 5161).

<sup>2314</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>2315</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>2316</sup> Idem.

<sup>2317</sup> AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

<sup>2318</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

<sup>2319</sup> Idem.

<sup>2320</sup> Sucesor del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, y antecesor del Visitador Jorge Escobedo.

<sup>2321</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

<sup>2322</sup> el mismo que propusiera la creación del nuevo Virreinato con capital en Buenos Aires (Acevedo, 1992, 544).

<sup>2323</sup> Phelan, 1972, 604.

<sup>2324</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

<sup>2325</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

<sup>2326</sup> número restringido de comerciantes locales que operaban en las canchas. Sobre estas últimas, ver Acevedo, 1992, 376.

<sup>2327</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

<sup>2328</sup> Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas,

---

Leg. 26, fs. 369v.

<sup>2329</sup> Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 369v.

<sup>2330</sup> Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina Domínguez; y marido de Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín Prudencio Pérez y de María Josefa Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia (Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los Mercaderes de Plata del Potosí (Tandeter, 1992, 155).

<sup>2331</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

<sup>2332</sup> Nació en Albuquerque, reino de Extremadura; hijo del Capitán José Mestre; y hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Acevedo, 1955, 10). Marido de Mercedes Allende Ascasubi, hija de Jose de Allende Losa Bravo y de Isidora Ascasubi y de las Casas.

<sup>2333</sup> Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

<sup>2334</sup> *Ibidem*.

<sup>2335</sup> *Ibidem*.

<sup>2336</sup> *Ibidem*.

<sup>2337</sup> *Ibidem*.

<sup>2338</sup> *Ibidem*.

<sup>2339</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.22. La fundación de los pueblos de Belén y de San Gabriel de Batoví, en territorio de la Banda Oriental poblado por indios Charrúas y Minuanes, la de la Villa de Concepción y el Fuerte Borbón en territorio Paraguayo poblado por indios Mbayás, y la de Ranchos y Chascomús en territorio bonaerense expuesto a los malones de los indios Pampas, no se puede explicar sin la violencia que los Comandantes de Frontera ejercían sobre los vecinos de poblaciones menos expuestas, como fué el caso de Paysandú en la Banda Oriental, Asunción en el Paraguay, y el Zanjón en el pago de la Magdalena, respectivamente (Marilúz Urquijo, 1987, capítulos XI y XII; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; Sánchez Zinny, 1939, 108; Cabodi, 1950, 107; Viola, 1985, 75-83; y Barrios Pintos, 1989, VI, 119-134). Dicha violencia dió lugar a numerosos litigios y pasquines con poesías de protesta entre los cuales descuella el que ocurriera entre el Capitán de Milicias Benito Chain y el Capitán de Blandengues Jorge Pacheco (AGN, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.60-81). Paradójicamente, pese a dicho conflicto ambos oficiales resultaron posteriormente consuegros. En su producción poética, el Alcalde de Asunción José Marcos Vallejos, hacía eje en la explotación que significaba al vecindario de Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo tanto al pretender fundar la Villa Real de Concepción en el area de Coimbra y Albuquerque, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, en 1776 (Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Frakes, 1989, 497).

<sup>2340</sup> Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

<sup>2341</sup> Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer primero de Estéban Montenegro, Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y más luego de Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, autor de unas divertidas memorias (CC, 1938, III, 233).

<sup>2342</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32.

---

<sup>2343</sup> *Ibidem*.

<sup>2344</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.96, Exp.2557.

<sup>2345</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.98, Exp.2557.

<sup>2346</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

<sup>2347</sup> Sobre el fuero minero, ver Buechler, 1989, 19, nota 77.

<sup>2348</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de \$198.211 de manos de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos, Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795, fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466; y R.6, 1802, fs.495).

<sup>2349</sup> Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

<sup>2350</sup> Consulado de Buenos Aires, II, 1796-97, 650.

<sup>2351</sup> Hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa de Basavilbaso; marido de su prima hermana Justa Rufina Basavilbaso Garfias; y cuñado de Agustín Antonio de Erézcana, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar de Santa Coloma, y del Virrey del Río de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (FB, 1986, I, 201; y JR, 1989, ítem 6161).

<sup>2352</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109.

<sup>2353</sup> *Ibidem*. Ver también Tjarks, 1962, 198; y Socolow, 1978, 116.

<sup>2354</sup> Tjarks, 1962, I, 198-199.

<sup>2355</sup> Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

<sup>2356</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.9.

<sup>2357</sup> *Ibidem*.

<sup>2358</sup> *Ibidem*.

<sup>2359</sup> *Ibidem*.

<sup>2360</sup> *Ibidem*.

<sup>2361</sup> *Ibidem*.

<sup>2362</sup> *Ibidem*.

---

<sup>2363</sup> *Ibíd.*

<sup>2364</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.2.

<sup>2365</sup> AGN, Sala IX, 4-6-11, citado por Garavaglia, 1983, 378.

<sup>2366</sup> Ganster, 1993, 169.

<sup>2367</sup> Punta, 1988, 13-14.

<sup>2368</sup> Punta, 1988, 14 y 23.

<sup>2369</sup> nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

<sup>2370</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>2371</sup> No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

<sup>2372</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs. 4.

<sup>2373</sup> Ver Saguier, 1989, 276-277.

<sup>2374</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

<sup>2375</sup> *Idem.*

<sup>2376</sup> *Idem.*

<sup>2377</sup> *Idem.*

<sup>2378</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

<sup>2379</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.

<sup>2380</sup> Tjarks, 1962, I, 422.

<sup>2381</sup> Según Gonzalez y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica "...tendía a la división de poderes y funciones, pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u organismos especializados" (González y González, 1975, 505, nota 40).

<sup>2382</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Morales Guiñazú, Corominas, Crespo Naón, Lazcano Colodrero, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas LC, JR, y A-CH.

<sup>2383</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>2384</sup> El uso del Don parece haber sido un patrón de discriminación más fuerte aún que el de vecindad (Fradkin, 1992, 10). Solo accedían a la vecindad aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su

---

jurisdicción, fueren mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

<sup>2385</sup> ver Roca, 1983.

<sup>2386</sup> Lynch, 1967, 196.

<sup>2387</sup> Profesor Titular de la cátedra de Instituta en la Universidad de Córdoba.

<sup>2388</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463.

<sup>2389</sup> *Ibidem*.

<sup>2390</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

<sup>2391</sup> *Ibidem*.

<sup>2392</sup> *Ibidem*.

<sup>2393</sup> Conformado por Tomás de Arrigunaga y Archondo, Ramón Saravia, José Vicente de Toledo Pimentel, Calisto Ruiz Gauna, Matías Gómez Linares, Santiago Figueroa, Francisco Avelino Costas, Manuel Brizuela, y José Gabriel Arias Castellanos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.).

<sup>2394</sup> Era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480). Posteriormente, Calvo señaló que Doña Jerónima fué hija del segundo matrimonio de Domingo Martínez de Iriarte y de Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo; hermana del Diputado al Congreso de Tucumán Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte; media hermana del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y cuñada de Francisco Zenavilla, de Juan de Simón y Olazo, de Juan Manuel Pucheta y del Coronel realista Ventura José Marquiegui (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65).

<sup>2395</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

<sup>2396</sup> *Ibidem*.

<sup>2397</sup> Barbero, 1990, 45.

---

<sup>2398</sup> Barrionuevo Imposti, 1968, 51.

<sup>2399</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 353-354.

<sup>2400</sup> Segura, 1972, 87.

<sup>2401</sup> el origen de Nogoyá puede fijarse de modo conjetural en 1750 (Martínez, 1884, 14 y 25; Pérez Colman, 1936, II, 295 y 481; y Cervera, 1907, I, 501 y 582; citados en Razori, 1945, III, 258.

<sup>2402</sup> Hijo de Manuel Arias, natural de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

<sup>2403</sup> Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino (Crespo Naón, 1983, 56).

<sup>2404</sup> Hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (Crespo Naón, 1983, 76).

<sup>2405</sup> Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

<sup>2406</sup> Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En 1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN, Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5, Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

<sup>2407</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

<sup>2408</sup> Hijo del Alcalde de Hermandad Santiago Hereñú y Arbestain y de María Osorio, y nieto de Tomás Hereñú Arteaga, natural de Mondragón, Guipúzcoa, y de María Magdalena de Arbestain y del Peso (Segura, 1972, 86).

<sup>2409</sup> Pérez Colman, II, 296.

<sup>2410</sup> Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67.

<sup>2411</sup> Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Hijo de Antonio de Funes y de Juana Pavón (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 157).

<sup>2412</sup> Sosa Morales, 1965; y Duda de de Rosas y Herrera, 1968-69, 69.

<sup>2413</sup> Lamas, 1871, 305-316; Centeno, 1935; y Arribas, 1970.

<sup>2414</sup> Porreca, 1926; Vitulo, 1936; Montes, 1953; Robinson y Thomas, 1974, 12; y Barrionuevo Imposti, 1986, 65.

<sup>2415</sup> Quevedo, 1973, 103-117; Velásquez, 1975, 333-352; Viola, 1985, 75-83; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Barrios Pintos, 1989, 119-134.

<sup>2416</sup> suegro del prócer José de San Martín.

<sup>2417</sup> AGN, Consulado, Leg.5, n.1, Sala IX, 4-7-7, citado por Juan E. Pivel Devoto en el prólogo del tomo II del Archivo Artigas.

---

<sup>2418</sup> Romy, 1967, 22.

<sup>2419</sup> Mero, 1991, 43.

<sup>2420</sup> Pagden, 1997, 180.

<sup>2421</sup> Sobre la noción de estados superiores y subalternos, ver Jellinek, 1981, 58.

<sup>2422</sup> No debe confundirse este cargo con el de Teniente Oficial Real. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente Gobernador.

<sup>2423</sup> Lynch, 1958, 212.

<sup>2424</sup> Lynch, 1958, 203, 206 y 212. Como los Gobernadores de la Gobernación de Córdoba del Tucumán residían en Salta, "...por estar así mandado o porqué los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas como Córdoba a sus Tenientes, para que en éstos recayere la autoridad del gobierno en su ausencia (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463). Los Tenientes de Rey ganaban un sueldo de \$1.800 anuales (Acevedo, 1965, 91).

<sup>2425</sup> Lynch, 1967, 197; y Bruno, 1967, VI, 263. Dichos capitulares, conocidos con el apelativo de Sarracenos, fueron Manuel Martínez de Ochagavía, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola, Juan Antonio de Lezica, Miguel José de Riglos y José de Andújar (Barba, 1978, 303).

<sup>2426</sup> Coronel de Milicias. Sobrino de Adrián Pedro Warnes. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; conuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y Arráez (FB, I, 162; III, 153).

Warnes mantenía estrechos vínculos comerciales con el Consulado de Lima y era considerado por los agentes del Consulado de Cádiz, como uno de sus peores enemigos, conjuntamente con Francisco Rodríguez de Vida, Juan de Lezica y Antonio de Larrazábal (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Asimismo, Warnes cultivaba estrechos vínculos comerciales:

a) en Potosí con Plácido J. de Herrera (R.1-1747-fs.248) y Domingo Barragán;  
b) en Jujuy con Domingo Araujo (R.1-1747-fs.204v.; R.1-1748-fs.285), Gregorio de Zegada (MAW-R.2-1761-fs.45); y Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303);  
c) en Salta con Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303v.); d) en Tucumán con Manuel García (R.1-1747-fs.271);  
e) en Santiago del Estero con Manuel Bravo de Rueda (R.2-1761-fs.172v.; R.5-1763-fs.285);  
f) en Córdoba con Estéban Montenegro (R.2-1751-fs.465v.), Francisco del Signo (R.6-1771-fs.346v.) y Juan Francisco Roldán (R.6-1769-fs.205v.);  
g) en Chile con Nicolás Jil (R.1-1747-fs.313), José Toro y Villalobos y Manuel Alonso Velazco;  
h) en Paraguay con García Rodríguez Francia (R.2-1760-fs.214 y 222; R.6-1769-fs.242v.), Juan de la Costa (R.2-1760-fs.213 y 220) y Juan Miguel de Zugasti (R.2-1759-fs.67v.);  
i) en Santa Fé con Simón de Abechuco (R.2-1759-fs.61v.);  
y j) en Corrientes con Tomás Garay (R.6-1769-fs.207).

<sup>2427</sup> Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, Serie III, tomo VIII, pp. 454-455; citado por Lynch, 1967, 200; y por Socolow, 1978, 124.

<sup>2428</sup> Nacido en Palma de Mallorca, y casado con Cipriana Viana, hija de Toribio Viana y de Francisca Pérez Dávila (FB, I, 300).

<sup>2429</sup> Lynch, 1967, 206.

<sup>2430</sup> Learte, 1926, 281.

---

<sup>2431</sup> Lynch, 1967, 199.

<sup>2432</sup> Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).

<sup>2433</sup> En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los corregidores.

<sup>2434</sup> Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

<sup>2435</sup> AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

<sup>2436</sup> nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaquirre; con cuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, item 7165).

<sup>2437</sup> hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; cuñado del Comandante de Caballería Ligera Fernando Antonio de la Mora (padre del prócer Fernando de la Mora y del Casal); y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguari y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207). Según Furlong, Ribera se había indignado por el proceder criminal de Casal, al caer con 150 hombres armados sobre una toldería de indios Mbayás, asesinando a 75 de ellos a sangre fría (Furlong, 1954, 37). En realidad, Furlong idealiza la figura de Rivera, al ignorar un documento no catalogado existente en la Serie Criminales del AGN, donde consta que Casal se había opuesto, con anterioridad a la matanza, a reiterados proyectos del Gobernador Rivera (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88v). En efecto, en 1797, al igual que en 1788, el Regidor Decano del Cabildo de Asunción Don Fermín de Arredondo Lovatón, proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían financiados estancando el ramo de la yerba. A este proyecto se opuso con éxito en ese entonces el cabildante José del Casal y Sanabria, arguyendo en contrario que para financiar la milicia existía "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y cuando por otra parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas de no repetir premio" (Ibíd.). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibíd., fs.89). El objeto de este último proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibíd., fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron atribuidos a la oposición de Casal, le costó a este último, según el Dr. Mariano Zavaleta, ser implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel José de Espinola y Peña, en la cruel matanza de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. Del Casal fué detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, prisión de la cual salió absuelto en 1799 de culpa y cargo (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; Interior, Leg.40, Exp.3; y Tribunales, Leg.121, Exp.15).

<sup>2438</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 625.

<sup>2439</sup> Acevedo, 1972, 257. Era padre de Leandra Ximénez Lobatón, mujer del Marqués de Buenavista Don Fernando Venero y Moscoso, y abuelo de Juana Venero Moscoso, mujer del Corregidor de Chayanta y Tesorero General de Cruzada Francisco Rodríguez Dávila (AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1).

<sup>2440</sup> estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le

---

adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

<sup>2441</sup> Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (LC, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

<sup>2442</sup> contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203).

<sup>2443</sup> Félix Cabrera Celis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteteo de la Rosa y Carranza (Calvo, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (Calvo, 1936, I, 240; y LC, III, 195).

<sup>2444</sup> Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de

Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

<sup>2445</sup> Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Phelipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

<sup>2446</sup> Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lascano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de María Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

<sup>2447</sup> Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; y III, 1969, 145).

<sup>2448</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la

---

estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>2449</sup> Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

<sup>2450</sup> *Ibidem*.

<sup>2451</sup> Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilleddo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilleddo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2452</sup> Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Alborno y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>2453</sup> nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en Lazcano, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano; y padre del Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

<sup>2454</sup> mencionados anteriormente.

<sup>2455</sup> Acevedo, 1972, 258.

<sup>2456</sup> Hijo del Gobernador de Armas Juan José Iramain y de Pascuala Bailona Díaz Gallo, y marido de Paula López de Velasco y Sánchez de Zambrano, hija del Maestre de Campo José López de Velasco y de Magdalena Sánchez Sambrano y Maldonado de Saavedra (CC, III, 661; y Figueroa, 1927, 21).

<sup>2457</sup> Acevedo, 1965, 184.

<sup>2458</sup> Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado

---

con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

<sup>2459</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp.2, fs.3v.

<sup>2460</sup> artículo 73 de la Real Ordenanza de Intendentes (Lynch, 1967, 199).

<sup>2461</sup> En la Francia y la España de la modernidad absolutista esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030).

<sup>2462</sup> *Ibidem*.

<sup>2463</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.20, Exp.536.

<sup>2464</sup> *Ibidem*.

<sup>2465</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

<sup>2466</sup> Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97.

<sup>2467</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.18 (sin foliar). Los capitulares que firman el pedido de inhibitoria fueron Fermín de Arredondo y Lobatón, Francisco Olegario de la Mora, Benito Ramón Carrillo, Sebastián Antonio de Villalta, Juan Francisco Centurión, José Estéban de Arza, Francisco Antonio de los Santos Rubio, y Juan Baleriano de Zevallos.

<sup>2468</sup> *Ibidem*.

<sup>2469</sup> *Ibidem*.

<sup>2470</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

<sup>2471</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.133, Exp.12, fs.24.

<sup>2472</sup> abuelo materno de quien fuera Gobernador de San Luis Jacinto Videla Poblet.

<sup>2473</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.12, fs.26v.

<sup>2474</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, Exp.19, fs.33v.

<sup>2475</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.2, Exp.3.

<sup>2476</sup> Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie IV, t.III, 27 y 63, citado por Carbia, 1930, 56; y Vidal, 1937, 34.

<sup>2477</sup> Fontana, 1962, 78.

<sup>2478</sup> Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortiz, y de Francisco

---

Segura (Calvo, V, 39; y Morales Guinázú, 1939, 73).

<sup>2479</sup> Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351; y Morales Guinázú, 1939, 297).

<sup>2480</sup> Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

<sup>2481</sup> Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano de María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quien casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134; y Crespo Naón, 1983, 73).

<sup>2482</sup> Cervera, 1979, 529.

<sup>2483</sup> Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

<sup>2484</sup> Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, item 161).

<sup>2485</sup> Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio, marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y luego del Alcalde de Segundo Voto José Fermín Ruiz Poyo; de Pedro Nolasco, marido de Narcisa García Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo, 1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros, natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco.

<sup>2486</sup> Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre "...sobornando al Subdelegado que fué, en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes. Este principio me ha parecido conveniente poner en la alta comprensión de V.S. por que de éste dimana todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas, que dejó mi padre cuando falleció, de estas dimanan las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a

---

los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>2487</sup> Casó en Diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, ítem 150).

<sup>2488</sup> Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>2489</sup> Alferez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en 1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, ítem 137). Era hermano de Teresa Domínguez, la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse, este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos (AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

<sup>2490</sup> citado anteriormente.

<sup>2491</sup> Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, Andalgalá. Pretendía que la Real Hacienda le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un Colegio en el Valle de Catamarca (Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). A su muerte, accedió al mayorazgo su sobrino Salvador Díaz de la Peña, marido de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San Felipe, Chile, y padre de Marcelo Antonio Díaz de la Peña, marido de Josefa Figueroa Ceballos, de Agustina Díaz de la Peña, mujer de Miguel Molina; y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el General Luis José Díaz de la Peña mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá. Así Santa Bárbara, alias La Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a su sobrina Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306).

<sup>2492</sup> Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, ítem 181). Sánchez de la Madrid era simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José González Thames; primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde; y tío carnal de un yerno del Alcalde Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera. Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

<sup>2493</sup> Natural de Cádiz, hijo de José de Porcelo y de Salvadora Zuaso, marido de Rosa González, hija del Capitán Francisco González, natural de Santiago de Chile, y de María de Abreu y Figueroa, y suegro de Juan de Zamalloa, natural de España (Corominas, 1987, ítem 1 y 131).

<sup>2494</sup> El Cabildo de Tucumán al Gobernador de Buenos Aires Juan José Vértiz, 12-III-1772.

<sup>2495</sup> Francisco Xavier Sánchez de Madrid al Gobernador Juan José Vértiz, 31-V-1773 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>2496</sup> Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombes, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de

---

Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920, 252). Era también tío de José Colombres y Thames, nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés y González de la Borbolla (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

<sup>2497</sup> Hijo del Maestre de Campo Miguel de Molina y de Agustina López, casado en primeras nupcias en 1747 con Agustina Cháver Domínguez, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira), y en segundas nupcias en 1755 con María Josefa Villafañe, hija del Teniente Gobernador Diego de Villafañe y Guzmán y de María Corvalán y Castilla; y hermana del R.P. Diego León Villafañe, S.J., jesuita expulso, que retornara al Tucumán desde su exilio en Roma. Era concuñado en su primer matrimonio de Fermín Texerina, de Francisco Xavier Villafañe, y de Juan López Ríos (Corominas, 1987, items 118, 156, 196 y 214), y en su segundo matrimonio de Francisco Antonio Zorroza y de Martín León García (Corominas, 1987, items 157, 184 y 206). Fué padre del célebre abogado y patriota Manuel Felipe de Molina, casado con María del Tránsito López de Velazco, y del poeta R.P. José Agustín Molina (Avila, 1915, 298-302; Garro, 1900; Ponssa, 1912; y Tonda, 1966, 1967;).

<sup>2498</sup> Francisco Xavier de Villafañe al Teniente de Rey Diego de Salas, 30-XI-1773, Tucumán (AGN, Sala IX, 22-2-6).

<sup>2499</sup> Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid]" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>2500</sup> ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.47, Exp.9.

<sup>2501</sup> Ravignani, 1937, I, 49.

<sup>2502</sup> Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

<sup>2503</sup> Ravignani, 1937, I, 49.

<sup>2504</sup> Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

<sup>2505</sup> Martínez Ortega, 1989, 216; y Pietschmann, 1992, 329. Las relaciones de parentesco surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elías (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elías, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia

de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

<sup>2506</sup> Santiago del Estero contaba con una población de 128 varones españoles adultos casados, sobre un total de 318 varones adultos, o el 40,25%. La Rioja contaba con 288 varones españoles adultos casados, sobre un total de 772 adultos varones, o el 37,30%. Tucumán contaba con 384 varones españoles adultos casados, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 33,16%. La ciudad de Córdoba contaba con 700 varones españoles adultos casados, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 20,23%. Jujuy contaba con 126 varones españoles adultos casados, sobre un total de 644 varones adultos, o el 19,56%. La ciudad de Salta, contaba con 594 varones españoles adultos casados, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 17,33%. Por último, Catamarca contaba con una población de 300 varones españoles adultos casados sobre un total de 2139 varones adultos, o el 14%.

<sup>2507</sup> En Potosí, en oportunidad del litigio sobre la testamentaria del Coronel José de Andrés Sanz, el Dr. Pedro Vicente Cañete y Domínguez manifestaba que para combatir el nepotismo no era necesario que su sobrino carnal el Dr. José María de Lara y Villanueva Domínguez fuese el abogado de la causa, pues "...ha sido en todos tiempos tan imparcial mi Ministerio en la administración de Justicia, que haciendo de Juez en negocios propios de Parientes míos mui cercanos he sabido dar al Mundo en su misma condenación el testimonio más perentorio de que la sangre no ha tenido fuerza jamás en mi corazón contra la Justicia y los mismos litigantes contrarios han recibido en estos mis heroicos desprendimientos de la carne el cambio de la confianza con que se sometieron a mis juicios" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.19). El parentesco del Dr. Lara con Cañete se derivaba de "...Dn Juan José Domínguez mi Abuelo, y de Da Juana Domínguez prima hermana de este y Visabuela de aquel [Lara]: y contando los grados colaterales por donde nos unimos, resulta que hallandome yo en quarto grado de consanguinidad con Da. Luisa Villanueba Madre de dho Dr. [Lara] viene a ser mi sobrino en quinto grado dentro de una computación donde no alcanza ya la Providencia de la Ley. Con que siendo constante por esta regla que yo pudiera ser Juez balidamente en las causas propias que tubiese el Dr. Lara como Parte, debe ser mucho menor el embarazo para serlo en aquellas que el intervenga como mero Abogado" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29).

<sup>2508</sup> Acerca de esta familia colonial, ver Klein (1985).

<sup>2509</sup> Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.9, Exp.169.

<sup>2510</sup> *Ibidem*.

<sup>2511</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

<sup>2512</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

---

<sup>2513</sup> Ver Saguier, 1993, 81-85.

<sup>2514</sup> Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

<sup>2515</sup> Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16.).

<sup>2516</sup> Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque Colombres, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

<sup>2517</sup> casado con María de la Concepción del Moral.

<sup>2518</sup> Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera, con cuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

<sup>2519</sup> Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V. Gonsález.

<sup>2520</sup> Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

<sup>2521</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

<sup>2522</sup> Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

<sup>2523</sup> Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina del General Andrés Ortiz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fué educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias locales.

<sup>2524</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

<sup>2525</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

<sup>2526</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortiz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna (Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

<sup>2527</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

<sup>2528</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>2529</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>2530</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto

---

Ortíz de Ocampo.

<sup>2531</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

<sup>2532</sup> Ver Bazán, 1966, 1979.

<sup>2533</sup> para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos, 2.301 criados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas (información publicada por Caillet-Bois, 1930).

<sup>2534</sup> Con referencia a las tres ciudades de Cuyo, Sierra (1960) les asigna en 1777 -sobre la base de un documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello- una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%; 4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388 mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%; 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de los cuales 1908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1800 eran blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

<sup>2535</sup> para Jocelyn-Holt Letelier (1992) el ascenso de Buenos Aires "permitió que Chile ejerciera un papel intermediario en un esquema triangular clásico en virtud del cual el tercero más débil logra cierta autonomía oponiéndose a los otros dos más fuertes" (Jocelyn-Holt Letelier, 1992, 53).

<sup>2536</sup> Ver Mansilla, 1941.

<sup>2537</sup> Comadrán Ruiz, 1962, 39. En esa época Videla mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.2-1766-fs.313v.).

<sup>2538</sup> hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla, padres de Maria Josefa Videla, mujer de Raymundo Pelliza Morales, y del R.P. Ramón Videla S.J., jesuita expulso; y en segundas nupcias con Catalina Chacón (Calvo, IV, 334; Verdaguer, 1931-32, 440 y 485; Mansilla, 1941, 144; y Fontana, 1962, 80). Francisco Videla y Aguiar era asimismo primo hermano de Clara Isabel Escalante Videla, mujer de Francisco Corbalán de Castilla, y madre de los curas Luis, Antonio, Miguel Fermín y Juan Corvalán y Escalante, todos ellos jesuitas expulsos (Verdaguer, 1932, 440). Probablemente Don Francisco fué de filiación sarracena, partidario de los Jesuitas, por el hecho de tener un hijo y cuatro sobrinos Expulsos.

<sup>2539</sup> hijo de Juan Bautista de la Reta y Landó y de María de Videla y Lucero de Tovar; marido de Antonia de Videla Salazar; padre del Pbro. José Eduardo de la Reta; y primo segundo de Francisco Videla y Aguiar (Calvo, IV, 333 y 29; Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598).

<sup>2540</sup> Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

<sup>2541</sup> Hijo de Antonio Corvalán de Castilla y Rocha y de Magdalena Arias de Molina y Videla; y suegro del Fiscal de la Real Audiencia de Chile Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio Molina y Coria, de José Xavier Santander y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, de Matías de Godoy Lima Melo, de María Manuela de Sotomayor y Videla, y de Carmen Martínez de Rozas y Correas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

<sup>2542</sup> Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; padre del Gobernador de Concepción y prócer de la Independencia de Chile, Juan Martínez de Rozas; y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alférez Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

<sup>2543</sup> Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y

---

Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correas, de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán, de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas, de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza, y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

<sup>2544</sup> Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

<sup>2545</sup> hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

<sup>2546</sup> marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

<sup>2547</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6.

<sup>2548</sup> Casa con María Prudencia de Escalante. En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiralde y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

<sup>2549</sup> Hijo de José Xavier de Santander y Coria y de Andrea Corvalán de Castilla y Chirinos de Posadas, sobrino político del Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio de Molina y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, y de Matías de Godoy Lima y Melo; y cuñado de Ignacio Domingo Corvalán Escalante (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

<sup>2550</sup> Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candiotti fué elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve personalmente en este empleo, sino que como hombre de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.11).

<sup>2551</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.45.

<sup>2552</sup> Marido de Francisca de Borja Corvalán y Chirinos de Posadas, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada.

<sup>2553</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Civil-Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.7).

<sup>2554</sup> Hijo de Pedro Güiralde y Rosa Molina, suegro del Alguacil Mayor Rafael Vargas. Sostuvo un litigio con sus propios padres sobre el cobro de una escritura en setiembre de 1780 (Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.35).

<sup>2555</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.148, Exp.5, fs.44.

<sup>2556</sup> Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

<sup>2557</sup> Bautizado en septiembre de 1743, hijo del Maestre de Campo Juan Luis Corbalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada, casado en 1768 con María Manuela de Sotomayor y Videla (Calvo, V, 176). Padre de Eugenio, Victoriano, y Gabino Corvalán y Sotomayor.

---

<sup>2558</sup> Integrado por Domingo García, Clemente Godoy, Isidro Sáenz de la Maza, Manuel Ochoa, Juan Miguel García, Joaquín Sosa y Juan Manuel Díaz Barroso (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18, Documento 4). A Juan Manuel Díaz Barroso la Comandancia Militar de Mendoza lo demanda por injurias en 1803 (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.8). Manuel Ochoa demanda en 1793 a Julián Galvez por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.14, Exp.15). Isidro Sáinz de la Maza casó con Petronila Sotomayor, hija de José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla y Zalazar, y era concuñado de Félix Correas, Domingo Corbalán, Manuel Fernández de Aranda, José Clemente Benegas, y Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Clemente Godoy Videla era nacido en 1760; hijo de Nicolás Godoy y del Pozo y de Magdalena Videla y Martínez de la Peña; casado con Nicolasa Cruz del Castillo; padre del prócer Tomás Godoy Cruz; y suegro de José Villanueva.

<sup>2559</sup> Integrado por Antonio Lemos, Melchor Videla, Sebastián Baldor, José Obredor, Pablo Salia, Mateo Delgado, Justo Alvarado, y Nicolás Plaza (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18, Documento 4). Melchor Videla era hijo de José Leandro Videla y Correas de Larrea, b.1754, y de Felipa Ortiz Gamboa, desposados en 1780; marido de Francisca Cabero; y padre del Coronel Juan de la Cruz Videla.

<sup>2560</sup> Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Alferez Real en 1808 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18, Documento 8). Casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110; y Morales Guíñazú, 1939, 286).

<sup>2561</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

<sup>2562</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

<sup>2563</sup> Alguacil Mayor, casó con Tomasa Güiralde, hija de Fernando Güiralde, Alguacil Mayor del Cabildo de Mendoza en 1777. Fueron padres de Isabel Bargas Güiralde, mujer del Coronel José Félix Aldao, hijo del Comandante Francisco de Esquivel y Aldao y de María del Carmen Anzorena y Nieto, y de Pedro Bargas, el primer agente de espionaje del Ejército de los Andes, marido de Rosa Corvalán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.148, Exp. 5, fs.38; Morales Guíñazú, 1939, 7; y Cutolo, I, 327). En 1800 Rafael Bargas celebra una compañía con Bernardo Claris (AGN, Protocolos, Reg.73, 1800, fs.45). El mismo año demanda por calumnias y difamación a Pedro Tuella (AGN, Interior, Leg.49, Exp.18).

<sup>2564</sup> hijo del Maestre de Campo Juan Gregorio de Molina y Vasconcelos y de Josefa Ventura de Videla, y hermano y suegro de Manuel Ignacio de Molina (Calvo, IV, 351). Casado con Josefa Sotomayor Videla; hija del Corregidor José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla Salazar; cuñada de Domingo Rege Corvalán, Isidro Sáinz de la Maza, Félix Correas, y José Clemente Benegas; y padre del que fuera Gobernador de Mendoza Pedro Molina Sotomayor (Morales Guíñazú, 1939, 210; y Comadrán, 1962, 45).

<sup>2565</sup> marido de Petronila Mayorga (Fuenzalida Grandón, 1972, 625); y probablemente hijo de Vicente José Cavero y de una Videla.

<sup>2566</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

<sup>2567</sup> *Ibidem*, fs.26v.

<sup>2568</sup> Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60).

---

<sup>2569</sup> Hijos de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

<sup>2570</sup> Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).

<sup>2571</sup> *Ibidem*. El hueco o interregno forzoso de los cargos capitulares y la limitación anual del término de las alcaldías procedían del derecho romano. Según Patterson (1993), para asegurarse de que participaran la mayor cantidad posible de miembros de las clases superiores, los romanos limitaban rígidamente la duración de los altos cargos (Hopkins, 1974, 103-10; y Badian 1972, cap.3; citados por Patterson, 1993, 310).

<sup>2572</sup> Hijo del Alcalde Salvador del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré. Fue padre del célebre político y congresista Salvador María del Carril, enemigo acérrimo de la facción "apostólica", continuadora de la facción pelucona, liderada por los hermanos Videla Lima (Carte, 1958; y Mansilla, 1941, I, 186). María Josefa Sánchez de Loria era hija de Vicente Sánchez de Loria, y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y nieta materna del Maestre de Campo Phelipe Jofré y Quiroga y de Juana Bravo de Montenegro (Calvo, II, 48).

<sup>2573</sup> Hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (Calvo, IV, 327).

<sup>2574</sup> Hijo del Encomendero y Maestre de Campo Remigio Albarracín Balmaceda, y de Josefa Juana Irrazábal y Sánchez de Loria, y sobrino de Fray Jacinto Irrazábal Sánchez de Loria. Este último donó a su sobrino político Remigio Albarracín su biblioteca (Furlong, 1944, 70). Casó Albarracín con Justina de Allende Quiroga Sarmiento (Calvo, V, 28).

<sup>2575</sup> Hijo de Juan Miguel de Oro y Cossio y de María Elena Albarracín. Fué agente comercial de Martín Alzaga, y padre del prócer Fr. Justo Santa María de Oro, quien a su vez era tío de Domingo Faustino Sarmiento (Cutolo, V, 190; y Wildner-Fox, 1966). Su padre fué primo de Clara de la Rosa y Oro, mujer de Pedro Carril; tío de José Antonio Godoy Oro, marido de Francisca Regis de la Rosa, designado por el Real Consulado diputado en la ciudad de San Juan para el bienio de 1804-06, y autor de un célebre Informe acerca de la realidad económica sanjuanina (Tjarks, 1957).

<sup>2576</sup> Hijo de Juan de Echegaray y Quiróz y de María de Laciár; marido de su prima Josefa Gabriela Riveros Echegaray; y cuñado de Francisco Niño Ladrón de Guevara, natural del Puerto de Santa María, y de Tomás Miguel Blanco Basurco, natural de Buenos Aires (Silva Argañaraz, 1991, 5).

<sup>2577</sup> Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).

<sup>2578</sup> *Ibidem*.

<sup>2579</sup> *Ibidem*.

<sup>2580</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp. 3, fs.25.

<sup>2581</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 26.

<sup>2582</sup> *Ibidem*, fs. 62v.

<sup>2583</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 62v.

<sup>2584</sup> Duodécimo hijo de Jacinto Bernardo de Aldao y de María Teresa Rendón y Lariz; contrajo primeras nupcias con la cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea de Zaballos (Crespo Naón, 1983, 60; y Fernández de Burzaco, I, 61-62; y V, 253). Fué hermano menor del Secretario del Virrey Vértiz, el Dr. Antonio Basilio Aldao y Rendón; cuñado del poeta Juan Manuel de Labardén y de Manuel de la Quintana; y padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de

---

María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candiotti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candiotti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candiotti, casado con su prima Leonor Candiotti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

<sup>2585</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

<sup>2586</sup> Casado con Paula de Izca y Aranibar (Crespo Naón, 1983, 50 y 78).

<sup>2587</sup> Hijo de Teodoro Candiotti, oriundo de Venecia, y de Leonor Mugica. Había logrado demostrar su dedicación al comercio, pues entre 1744 y 1751 había realizado siete viajes al puerto de Buenos Aires con el objeto de comerciar con Pedro de Lea por valor de \$25.378 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.243; Reg.2, 1745, fs.167; Reg.4, 1749, fs. 239; Reg.1, 1750, fs.101; Reg.4, 1751, fs.189v.; Reg.5, 1751, fs.300; y Reg.2, 1751, fs.461).

<sup>2588</sup> Sargento Mayor y Regidor Propietario de Santa Fé. Hijo de Francisco Martínez del Monje, natural de Santo Domingo de la Calzada, Castilla la Vieja, y de Isabel de Pessoa y Figueroa (Probst, 1946, 13; y Crespo Naón, 1983, 50). Casó en primeras nupcias con María de Rojas y Aranda, natural de Asunción del Paraguay, hija del Capitan Isidro de Rojas y Aranda y de María Servin, y segundas nupcias con Dominga de Mendieta y Zárate, santafesina, hija del Sargento Mayor Pedro de Mendieta y Zárate y de María Alvarez del Castillo (Calvo, 1988, 63).

<sup>2589</sup> Hijo del Teniente de Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Luisa Salguero de Torres Cabrera, casado con Juana Ventura López Pintado (Crespo Naón, 1983, 56).

<sup>2590</sup> Casado con Antonia Vera Mujica, hija de Francisco Vera-Mujica, bautizado en Santa Fé en abril de 1675, Alcalde de Santa Fé en 1700, Procurador en 1703, y Regidor Perpetuo en 1708. Francisco Vera Mujica era casado en primeras nupcias en Córdoba con Luisa de Torres, hija de Pedro de Torres, nacido en Jerez de la Frontera, y de Luisa Isabel Salguero, y en segundas nupcias con su cuñada María Josefa Vera-Mujica, viuda de Manuel Francisco de Gaete. Urizar era cuñado de Don Francisco Antonio Vera-Mujica, casado con Juana Ventura López Pintado (Espejo, 1967, 839).

<sup>2591</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 309v. Francisca Martínez del Monje y su marido el Sargento Mayor Ignacio de Barrenechea eran suegros de José Vicente Zabala, Ignacio Crespo, y Cayetano Echagüe (Crespo Naón, 1983, 62). María Martínez del Monje, hija de Francisco, estaba casada con el Maestre de Campo Juan de Lacoizqueta (Probst, 1946, 13; y Calvo, 1988, 60).

<sup>2592</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 312v.

<sup>2593</sup> Idem.

<sup>2594</sup> Idem.

<sup>2595</sup> Idem.

<sup>2596</sup> Idem.

<sup>2597</sup> Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, casado con Isidora Fernández de Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano del R.P. Juan Baltasar Maziell, de María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quién casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134-136; y Crespo Naón, 1983, 73).

<sup>2598</sup> Cervera, 1979, 529.

<sup>2599</sup> Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia

---

Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

<sup>2600</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.5.

<sup>2601</sup> Casado con Antonia de Vera y Mújica.

<sup>2602</sup> Alcalde de primer voto en 1779, 1798, 1803, y 1804, y Recaudador de Propios en 1793 (AGN, Hacienda, Leg.67, Exp.1800). Fué bautizado en Octubre de 1739, hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y casado en primeras nupcias con María Josefa de Vera Muxica, hija de Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, y en segundas nupcias con Bonifacia Carballo, hija de José Carballo y de Sebastiana Ruiz de Arellano. Era hermano del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía, el que apoyaba a los Mocobíes contra los Abipones, y cuñado de los comerciantes Jose de Uriarte, Gabriel Francisco de Lassaga, y Simón de Abechuco y Retana (Crespo Naón, 1983, 66). En 1789 interviene en el juicio de disenso de su sobrino José G. Lassaga con Juana Isabel Medina (AGN, Tribunales, Leg.182, Exp.2).

<sup>2603</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.113v.

<sup>2604</sup> Hijos o nietos del que fuera en 1700 Teniente Gobernador de Santa Fé Tomás de Hereñú Arteaga y Echeverría, natural de Guipúzcoa, y de su mujer María Magdalena de Arbertain y del Peso (Crespo Naón, 1983, 50).

<sup>2605</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

<sup>2606</sup> natural del Valle y Obispado de Santander, hijo de Manuel Diego Pacheco y de Francisca Gómez Pacheco, marido de María Teresa de la Concha, padre del General Angel Pacheco, y suegro de José Julián Arriola (FB, V, 103; y JR, 1989, ítem 7011). No estoy seguro si en realidad se trata del Dr. Lorenzo Antonio Pacheco, teólogo y abogado de la Real Audiencia de Charcas.

<sup>2607</sup> Nacido en Santurce, Vizcaya, hijo de Diego Ventura de la Elguera y de María Josefa de Ciancas, casado en 1794 con María del Carmen Velarde y Cabot, hija de Pedro de Velarde y Calderón, bautizado en Conchillos, Torre la Vega, Santander, y de Trinidad Cabot y García (Calvo, I, 369; e Ibarguren, 1961, 134-136). En 1775 mantuvo con su socio Marcos Salinas, vecino del Paraguay, un litigio sobre cuentas de su comercio en yerba (AGN, Tribunales, Leg.S-6, Exp.19). En 1805 demanda por cobro de pesos a Juan J. Zapiola (Guillamondegui, 1962).

<sup>2608</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

<sup>2609</sup> Idem.

<sup>2610</sup> Idem.

<sup>2611</sup> Idem.

<sup>2612</sup> Idem.

<sup>2613</sup> Coronel de Milicias y Teniente Gobernador, hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y hermano de Lucas de Echagüe y Andía. Era casado con Isabel Maciel, hija del Maestre de Campo Baltasar Maciel y de Rosa de Lacoizqueta; padre de Juan Francisco, Cayetano, y Narciso de Echagüe y Maciel; y hermano de Joaquín Maciel (Crespo Naón, 1983, 67).

<sup>2614</sup> Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino (Crespo Naón, 1983, 56).

<sup>2615</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

<sup>2616</sup> Ibidem.

---

<sup>2617</sup> *Ibídem.*

<sup>2618</sup> *Ibídem.*

<sup>2619</sup> Hijo de Antonio Candioti y Muxica y de María Andrea de Zevallos, casó en primeras nupcias con Petrona Zalazar, y en segundas nupcias con Juana Ramona de Larramendi, hija de José Teodoro de Larramendi y de Antonia Manso. Era Francisco Antonio Candioti cuñado de Juan Francisco Aldao, por ser este último casado con Leonor Candioti, suegro de José Urbano de Iriondo Narbarte, y consuegro de Agustín de Iriondo Alberdi (Crespo Naón, 1983, 63 y 68). En 1775 Amaro Rodríguez le inicia un juicio por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.R-14, Exp.28). Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candioti fué elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve personalmente en este empleo, sino que como hombre de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.11).

<sup>2620</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.12.

<sup>2621</sup> Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Muxica, y de María Andrea de Zevallos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

<sup>2622</sup> Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y Eudara, sobrino de Martín de Gamboa, vecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (Crespo Naón, 1983, 66 y 71).

<sup>2623</sup> Hijo del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía y de Isabel Maciel, y casado con su prima hermana Rosa Maciel y Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 67).

<sup>2624</sup> En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773 Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12, Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

<sup>2625</sup> Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con Antonia Manso, hija de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana Ramona de Larramendi, mujer del Gobernador Francisco Antonio Candioti (Crespo Naón, 1983, 70).

<sup>2626</sup> Hijo de José Francisco Troncoso y de Catalina de Echagüe y Andía; hermano de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe, mujer de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y casado con Ana Inés de Mendieta y Díez de Andino; padre de María del Tránsito Troncoso y Echagüe, b.1782, mujer del catalán Mariano Comas y Senné, de Juana Troncoso, mujer del catalán Sebastián Puig, de Gregoria, casada con el murciano Julián Galvéz; y de María Ignacia Troncoso, casada con el catalán Quirce Pujato Vidoll; y concuñado de su primo hermano carnal Isidro Ignacio de Echagüe y Gaete (Crespo Naón, 1983, 76).

<sup>2627</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

<sup>2628</sup> *Ibídem.*

---

<sup>2629</sup> *Ibídem.*

<sup>2630</sup> *Idem.*

<sup>2631</sup> *Idem.*

<sup>2632</sup> Hijo de Narciso Javier de Echagüe y Gaete, Alcalde entre 1752 y 1761, y de María Teresa Ruiz de Arellano, y casado con su prima hermana María Francisca de Lassaga, hija de Gabriel de Lassaga y de Francisca Xaviera de Echagüe (Crespo Naón, 1983, 66).

<sup>2633</sup> Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

<sup>2634</sup> *Idem.*

<sup>2635</sup> Hijo de José Crespo y de Casilda Carballo y Aguilera del Pino, casó con María del Tránsito Zavala y Barrenechea, hija de José Vicente Zavala y de María Lucía de Barrenechea (Calvo, III, 213). Era Ignacio Crespo cuñado del Regidor José Antonio Fernández de Villamea, del Alcalde José Ventura de la Lastra, del comerciante Juan de Morlius, y de Pablo Chalabert o Gelabert (Crespo Naón, 1983, 64). Fué padre de Domingo Crespo, marido de Dolores Rodríguez del Fresno, y de Antonio Crespo, desposado en 1818 con Dolores Candioti Larramendi (Calvo, III, 213).

<sup>2636</sup> Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

<sup>2637</sup> Casó con Manuela Obarrio Fernández (FB, 1986-90, III, 292).

<sup>2638</sup> Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

<sup>2639</sup> *Idem.*

<sup>2640</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

<sup>2641</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

<sup>2642</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2.

<sup>2643</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

<sup>2644</sup> Para la consideración de las oligarquías correntinas del siglo XVII, ver Cañedo-Argüelles, 1988, 180-187.

<sup>2645</sup> Maeder, 1981, 105.

<sup>2646</sup> natural de Bilbao, quien llegó al Río de la Plata en 1696 con su tío Juan de Zamudio, casando primero en Córdoba con Francisca Ordóñez, y luego en Corrientes en 1721 con Ana Maciel, hija del Teniente Gobernador General Baltasar Maciel y de Gregoria Cabral de Melo.

<sup>2647</sup> Calvo, 1938, III, 231. Ver Saguier, 1993, 111.

<sup>2648</sup> concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña.

<sup>2649</sup> Labougle, 1953, 170. Lagraña fué a su vez suegro de Juan García de Cossio (Mazzuchi, 1992, item 896).

<sup>2650</sup> Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959, 297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de

---

Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús (Labougle, 1941, 116).

<sup>2651</sup> Hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno del Teniente Gobernador de Corrientes General Francisco de Villanueva y de Juana Cabral, viuda de Alpoin.

<sup>2652</sup> hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno de Francisco Ruiz de Bolaños y de Ana Maciel. Fué muerto en Yapeyú en 1754 durante las Guerras Guaraníticas, provocando la misma gran desconcierto en Corrientes (Maeder, 1975, 428). Cuando su mujer enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Padre de Francisco Xavier Casajús, quien a fines del siglo XVIII poseía una encomienda con 259 indios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.27, Exp.7).

<sup>2653</sup> Casado dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

<sup>2654</sup> Labougle, 1953, 136. Ver Saguier, 1993, 112.

<sup>2655</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4, 1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

<sup>2656</sup> Nacido en Jerez de la Frontera.

<sup>2657</sup> Labougle, 1953, 144.

<sup>2658</sup> marido de Juana Garay (Mazzuchi, 1992, ítem 851).

<sup>2659</sup> marido de Isabel Solís (Mazzuchi, 1992, ítem 368).

<sup>2660</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

<sup>2661</sup> *Ibidem*.

<sup>2662</sup> *Ibidem*.

<sup>2663</sup> *Ibidem*.

<sup>2664</sup> Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>2665</sup> *Ibidem*.

<sup>2666</sup> *Ibidem*.

<sup>2667</sup> *Ibidem*.

<sup>2668</sup> Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959, 297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús (Labougle, 1941, 116). Sebastián casó dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

<sup>2669</sup> Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>2670</sup> Segundo marido de Rosa Ruiz de Bolaños, viuda de Bernardo Casajús.

<sup>2671</sup> Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

---

<sup>2672</sup> Interpretación prudente y benigna de la ley según las circunstancias de tiempo, lugar, y persona (Escrache, 1863); y equidad según Tau Anzoátegui, 1992, 532.

<sup>2673</sup> Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>2674</sup> Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 5-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>2675</sup> Idem.

<sup>2676</sup> Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

<sup>2677</sup> Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano Rolón (marido de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel Luque), y Fernando Soberón (Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, items 18, 415, 523, 653, 694, 328, 404, 853 y 872).

<sup>2678</sup> Oriundo de la casa solariega hidalga y blasonada de Cossio, del Valle de Rionansa, Santander, y bautizado en 1732. Hijo de Justo García de Cossio y de Ana Gómez de Cossio. Casó en primeras nupcias con María Josefa Zamudio y Bolaños, y en segundas nupcias con su sobrina política Antonia Rosa Timotea Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio; y fué padre del Dr. José Simón García de Cossio y Zamudio, marido de su prima segunda Josefa de Vedoya y Lagraña; y de Estanislada García de Cossio y Lagraña, mujer de Santiago Gutiérrez (Cutolo, 1963, 73; Calvo, IV, 33; Palma, 1957; Bonastre, 1936; y Mazzuchi, 1992, item 896).

<sup>2679</sup> Martínez González de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]). León Martínez de Ybarra estaba casado con María Ignacia de Acosta y Zamudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, I, 29).

<sup>2680</sup> Martín González de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]).

<sup>2681</sup> Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la Portilla (Lafuente, 1941).

<sup>2682</sup> AGN, Justicia, Leg.18, Exp. 475.

<sup>2683</sup> Natural de Jeréz de la Frontera.

<sup>2684</sup> Ver Saguier, 1993, 11.

<sup>2685</sup> Acerca del deseo de incesto en la familia humana y en el pensamiento cristiano, ver Shell, 1994.

<sup>2686</sup> "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar).

<sup>2687</sup> Ibidem.

<sup>2688</sup> Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

<sup>2689</sup> acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

---

<sup>2690</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>2691</sup> La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

<sup>2692</sup> El primero casado con Manuela de Escobar Castellanos y Arias Velázquez, y el segundo con Margarita Sánchez Palacios (Cutolo, I, 228).

<sup>2693</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

<sup>2694</sup> Cúneo-Vidal, 1978, 180.

<sup>2695</sup> Dueño de Campo Santo, introducido de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

<sup>2696</sup> Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14).

<sup>2697</sup> Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

<sup>2698</sup> Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silípica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y con cuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

<sup>2699</sup> Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja

---

Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, ítem 161).

<sup>2700</sup> Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio, marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y luego del Alcalde de Segundo Voto José Fermín Ruiz Poyo; de Pedro Nolasco, marido de Narcisa García Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo, 1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros, natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco:

<sup>2701</sup> Acevedo, 1969, 170.

<sup>2702</sup> Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en 1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, ítem 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José Domínguez, padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez, bautizado en Tucumán en junio de 1801; y hermano del Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214). Asimismo, fué suegro de Manuel Fernández Carranza y de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744. En otras palabras Manuel Pose y Manuel Carranza eran concuñados (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379).

<sup>2703</sup> González Ledo y Saguier (1991).

<sup>2704</sup> Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre, "...sobornando al Subdelegado que fué, en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes. Este principio me ha parecido conveniente poner en la alta comprensión de V.S. por que de éste dimanar todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas, que dejó mi Padre cuando falleció, de estas dimanar las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>2705</sup> Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (Calvo, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros, y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre,

---

1911; Calvo, I, 71; y Cutolo, I, 191).

<sup>2706</sup> Marido de María Catalina Medina, hija de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina de Aráoz y Rodríguez Viera; nieta materna del Capitán Ignacio Inocencio de Aráoz y de Teresa Rodríguez Viera; y madre del Pbro. Francisco Tejerina y Medina, de Catalina de Tejerina y Medina, mujer de José Millán, del Alcalde Fermín Tejerina y Medina, del médico Baltasar Tejerina, y de María Antonia de Tejerina y Medina, mujer de Pedro Roca y Vidiella, natural de Tarragona, abuelos paternos del Presidente de la República Julio A. Roca (Luque Colombres, 1948, 121). Hermano del Gobernador de Armas Coronel Fermín Vicente Texerina, el mismo que se había solidarizado en 1772 con el frustrado Administrador del Estanco del Tabaco Gaspar de Salcedo.

<sup>2707</sup> Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid]" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>2708</sup> Actas Capitulares de Tucumán, en Índices Documentales (Tucumán: Archivo Histórico, 1974).

<sup>2709</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21.

<sup>2710</sup> Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, ítem 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

<sup>2711</sup> Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920, 252). Era también tío de José Colombres y Thames, nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés y Gonsález de la Borbolla (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

<sup>2712</sup> Casó con María Teresa Villafañe, sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial Francisco Sánchez de la Madrid y prima segunda con la mujer de Ruíz Poyo. Fueron padres de Pedro José Velarde, marido de Bárbara Urrea; y de Teresa Velarde Villafañe, mujer del Presidente de la República de Tucumán Bernabé Aráoz (Avila, 1920, 91). Fué José Velarde Interventor de la Renta de Correos de Tucumán, Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires. Renuncia a éste último cargo en 1800 (AGN, Hacienda, Leg.96, Exp.2485).

<sup>2713</sup> Natural de la Ciudad de Córdoba, hijo del General Juan de Figueroa y de Jacinta de Cabrera, casó en 1746 con Andrea Moreno Suárez de Cabrera, viuda del General Pedro Núñez Herrera (Corominas, 1987, ítem 110). Presidente de la Junta de Temporalidades. Padre de Miguel Figueroa (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5).

<sup>2714</sup> mantuvo contactos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.1-1754-fs.300; R.2-

---

1761-fs.244).

<sup>2715</sup> Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, ítem 150).

<sup>2716</sup> Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

<sup>2717</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21. fs.22v.

<sup>2718</sup> Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con María Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado en sus segundas nupcias del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina, hijo este último de José Miguel de Molina y de Agustina Díaz de Peña, una de las herederas del litigado Mayorazgo de Guazán (Avila, 1920, 87; Bustos Argañaraz, 1979, 30-32; Corominas, 1987, ítem 204 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83). Para una biografía de Barón del Pozo ver Furlong, 1952, 471-477.

<sup>2719</sup> Hijo de José de Medina y de Magdalena Pérez; sobrino de Catalina Medina, mujer de Francisco Tejerina y Barreda; nieto de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina de Aráoz y Rodríguez Viera; y marido de Ana Rosa Páez, hija de Josefa Páez (Corominas, 1987, ítem 195).

<sup>2720</sup> Oficial primero de la Real Renta de Correos. Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Avila, 1920, 66; y Díaz de Molina, 1956-57). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y María Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969). Dueño del Potrero El Rincón, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

<sup>2721</sup> Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en 1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, ítem 137). Era hermano de Teresa Domínguez, la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse, este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos (AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

<sup>2722</sup> Hijo de Diego Ignacio Aráoz y del Campo y de Josefa Paz de Figueroa; hermano de Javier Aráoz, marido de Petrona Valderrama; y del Pbro. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros; cuñado de Juan Manuel García Tezetia; y primo hermano del Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772 Miguel de Aráoz y Echávez. Era casado con Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño, padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, ítem 161).

<sup>2723</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.29v. El Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros, refutaba dicha aserción afirmando -al igual que los Allende habían sostenido el año anterior en Córdoba- que "...aunque la elección de José Miguel Medina no sea válida por lo que hace a los votos de sus parientes, es legítima en cuanto a los demás vocales libres de impedimento" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.30). Esta tesis Helgueros la fundaba en que

"...si acaso la ley Real requiere por forma de que los Parientes en los grados allí expresados no voten en las elecciones (lo que todavía es disputable) es una forma distributiva en cada vocal, y aunque indivisible en cada uno de por sí, es dividua (sic) en toda la elección" (Ibidem).

---

De modo que, para concluir, Helgueros argumentaba que la elección podía "...ser válida y al mismo tiempo nula por partes, como se ha visto en la donación excesiva" (Ibídem).

<sup>2724</sup> Miguel Aráoz, José Figueroa, José Thames, Luis Aguilar, José Molina, Juan Silvestre Deheza y Helgueros, Fermín Paz, Francisco Antonio Zorroza, Juan de Reto, Lorenzo de la Paliza, José de Berasaluze, Vicente Guevara, José Colombres y Thames, Francisco Xavier Gutiérrez, Miguel Viaña, Pedro Pablo Montenegro, José Gabriel García, Juan Antonio Porcelo, Juan Felipe de Paz, Juan de Mata de Uzqueda, José Huergo, Miguel Ignacio Aráoz, Pedro Gregorio López Cobo, José Manuel Aráoz, José Córdoba, Pedro Bernavé Gramajo, Francisco Díaz de Sobrecasas, Ramón Alvarez, Domingo Cabot, y Francisco Lizarralde de Aráoz (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.28).

<sup>2725</sup> Nacido en Albuquerque, reino de Extremadura, en 1720; hijo del Capitán José Mestre; y hermano del Teniente Coronel Félix Mestre, marido de Mercedes Allende Ascasubi (hija del General José de Allende y Losa y de María Isidora Ascasubi) (Acevedo, 1955, 10; AN, 1964, 87; LC, 1968, II, 142; y AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3).

<sup>2726</sup> Primo de Juan López Cobo. Casó con Francisca Bazán, hija de Juan Antonio Bazán y de Petrona Estévez, padres de Nicolás Valerio Laguna; de Benito Laguna; de Nicolasa Laguna, mujer de Domingo Villafañe, sin sucesión; del Pbro. Dr. Miguel Martín Laguna, cura de Trancas; de Gertrudis Laguna, mujer de Pedro Antonio Zavallá; y del Dr. Juan Venancio Laguna, marido de María Agueda Aráoz y Córdoba, hija de Juan Antonio Aráoz y de Josefa Córdoba y Gutiérrez (Avila, 1920, 62, 91 y 94). Mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.3-1760-fs.34), y con Juan de Lezica y Torrezuri (AGN, Protocolos, R.4-1761-fs.281v.; R.6-1769-fs.98). Su hijo, el Pbro. Miguel Martín Laguna, mantuvo en 1789 un conflicto con el Alcalde de segundo voto Juan Francisco del Prado y Revuelta que llegó hasta la Real Audiencia de Buenos Aires (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.67, Exp.26 y 27).

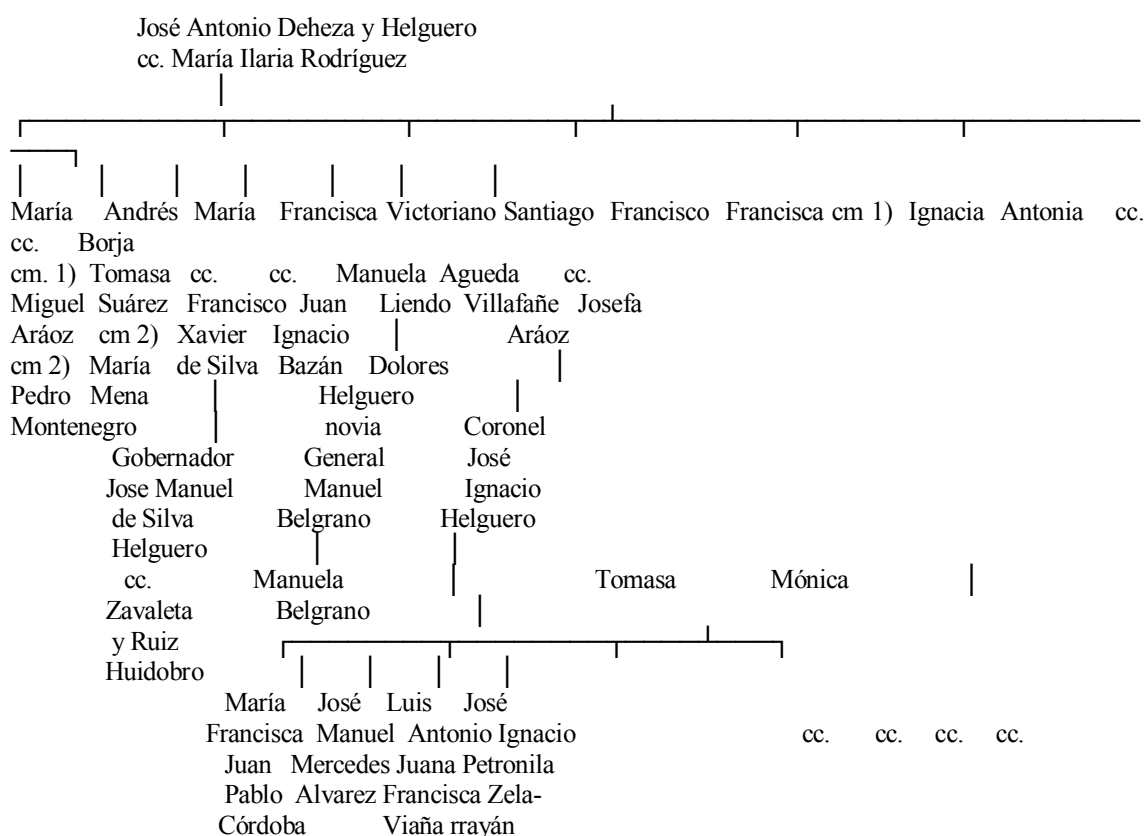
<sup>2727</sup> Cuando se lo designó debió haber sido un hombre anciano pues ya se había recibido como Regidor en 1732, habiendo desempeñado el cargo hasta 1739. Era hijo del Capitán Juan Nicolás de Aráoz y Bazán, y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Diego Ignacio Aráoz; y marido de Francisca de Saavedra Gramajo, hija de Juan de Saavedra Gramajo Lasso de Puellas y de Ana Diez Caballero. Fué padre de seis hijas mujeres, Josefa casada en 1738 con Francisco Alvarez Ferreyra; Ana casada el mismo año con Marcelo de Villagra de la Lastra, natural del Valle Calchaquí, hijo del Capitán Mauricio de Villagra y de Bernarda de la Lastra; Francisca, desposada en 1744 con José de Aranguren, hijo de Joaquín Aranguren y de Francisca de Goitia y Lezama, naturales del Señorío de Vizcaya; Damiana casada con Francisco López; y Claudia casada con José de Palacios Villagra, hijo de Pablo Palacios y de Melchora Villagra, naturales del Valle Calchaquí (Calvo, 1936, I, 67ss.; y Corominas, 1987, ítems 78, 99, y 132).

<sup>2728</sup> También nombró "...por Alcaldes de Hermandad a José Antonio García..., y a Joaquín Monzón, con dos sólos votos dados por el Alcalde de segundo voto Don Vicente Escobar y por el Regidor Francisco Texerina y Barreda; para Procurador General a Manuel Pérez Padilla electos por los dos expresados vocales; para Defensor General de Menores a José de Ojeda electo por el Alcalde de primer voto con los cuatro vocales que me han conferido su poder; y para Tesorero de Propios a José Millán con el único voto del expresado Alcalde de segundo voto Don Vicente Escobar" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.10v.).

<sup>2729</sup> Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras (1781), b. el 31-XII-1743, hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino carnal del Cura Párroco de Tucumán Dr. Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Juan Silvestre estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Xavier de Villavieja, natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas nupcias con Catalina Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María Francisca Helguero, mujer de Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia Helguero, mujer de Francisco Xavier de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don

Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela Liendo, padres de la que fuera la amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero, casado con Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del Comandante General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel José Ignacio Helguero, amigo y primo del General Gregorio Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas, 1987, ítems 35 y 145).

Cuadro A



(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

<sup>2730</sup> mantuvo estrechos vínculos comerciales con Francisco Rodríguez de Vida (AGN, Protocolos, R.3-1759-fs.311v.),

<sup>2731</sup> Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de Isidro de Murga y de Isabel Núñez de Avila, padres de Visitación Monzón, la cual casara con José Ignacio Gancedo (Avila, 1920, 97; y Corominas, 1987, ítem 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado [Domingo] García, y si salió libre al primer día del arresto, sin habersele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

<sup>2732</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.42v. En efecto, Juan Silvestre Helguero era primo hermano carnal de Miguel Ignacio, Francisco Xavier, Juan Antonio, Pedro Nolasco, y José Manuel Aráoz de la Madrid, así como de María Petrona Aráoz, mujer de Francisco José Díaz Vélez, de Mercedes Aráoz, mujer

---

de Julián Ruiz Huidobro, y de Catalina Aráoz, mujer primero de Juan José de las Muñecas, y luego de José Fermín Ruíz Poyo. Juan Silvestre era también tío político de Miguel Aráoz, hijo de su primo carnal Miguel Ignacio Aráoz; y de Josefa Aráoz, hija del Alcalde Pedro Antonio Aráoz.

<sup>2733</sup> *Ibídem.*

<sup>2734</sup> *Ibídem.*

<sup>2735</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

<sup>2736</sup> La obrepción era el fraude que se cometía "...en la obtención de alguna gracia, rescripto, empleo, o dignidad callando en la narración hecha al superior alguna verdad que era necesario manifestar para la validez del acto. La subrepción, por el contrario, era el fraude que se cometía en la obtención de dichas cosas avanzando hechos contrarios a la verdad" (Escriche, 1863, 1350).

<sup>2737</sup> Figura de construcción gramatical consistente en invertir el orden lógico en que deben colocarse las palabras.

<sup>2738</sup> Es la palabra o sentencia que se puede entender de dos modos (Escriche, 1863, 169).

<sup>2739</sup> Fraude que consiste en falsear una declaración, encubriendo los hechos.

<sup>2740</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

<sup>2741</sup> Actas Capitulares de Tucumán, 30-XII-1782, citadas por Murga, 1979, 226.

<sup>2742</sup> Marido de María Jacinta de Riglos, hija de Marcos José de Riglos y de Juana Xaviera de San Martín, concuñado del Intendente de Buenos Aires Domingo Reynoso, y primo político del Virrey Sobremonte (Gammalsson, 1980, 372).

<sup>2743</sup> Mariano Zavaleta a la Junta Provincial de Temporalidades, Agosto de 1792 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-5, fs.71).

<sup>2744</sup> *Ibídem.*

<sup>2745</sup> Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

<sup>2746</sup> Hijo de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa, sobrino carnal del Encomendero y Alcalde Francisco Solano de Paz, del Regidor y Maestre de Campo Domingo de Paz y Figueroa, y del Teniente Gobernador y Justicia Mayor General Juan José Paz de Figueroa; y sobrino político de los Maestres de Campo Roque Jacinto López de Velazco y Diego de Aráoz y del Campo (Calvo, 1924, 286; 1939, 177).

<sup>2747</sup> José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.1).

<sup>2748</sup> Hijo del Maestre de Campo José López de Velazco y de Magdalena Sánchez Sambrano, casado con Josefa Corvalán de Castilla.

<sup>2749</sup> José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.1).

---

<sup>2750</sup> Elizondo (1779) en su tomo III, juicio ordinario n.23, f.259, trae las ordenanzas en virtud de las cuales estaba impedido en los Cabildos la designación de parientes. Estas ordenanzas se originaban en el capítulo III de la Real Cédula del 15-XI-1767 (inhallable en nuestro Archivo), que condenaba en Córdoba la designación de alcaldes relacionados entre sí dentro del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos, y del segundo grado de afinidad, por computación civil y no canónica (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.2). También fué reiterada esta norma por Real Cédula de 28-IX-1778. Estas Reales Cédulas tenían a su vez su origen en las Ordenes Generales de los años 1722, 1725, y 1752 (Ley 3, Tit.6, Part.4). También procedían de la Real Provisión del 20 de agosto de 1641, la cual a su vez provenía del Fuero Juzgo, Título I de su Libro IV, así como de las Provisiones Reales dictadas por el Virrey Toledo en 1597 (Bayle, 1952, 120). La doctrina más completa acerca del parentesco se expuso en el Fuero Juzgo con carácter científico-legal, acompañándola con árboles genealógicos y computaciones, en el Título VI de la Partida IV, conformándose con el Derecho Romano y el Canónico (Ver la noción de parentesco en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana). También serían estas Ordenanzas de origen visigótico pues se practicaban ya en tiempos de Julio César en los senados de las naciones bárbaras asentadas en las Galias (Julio César, 1940, capítulo XXXIII).

<sup>2751</sup> "...párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar); y "...contra éste gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de primer voto, pues es del propio modo interesado en el nominado litigio, ...porque es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado prohibido para votar por la Ley 35, Título 2, Libro 2 de la Novísima Recopilación" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6). La Curia Filipica la encontró Furlong (1944) en las bibliotecas de Juan Martínez de Bayogorri, de José de Antequera, de Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Felipe de Haedo (Furlong, 1944, 41, 42, 43 y 67).

<sup>2752</sup> Levene, 1946; Malagón-Barceló, 1959; y Luján Muñoz, 1987.

<sup>2753</sup> Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67). Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142).

<sup>2754</sup> desplazada desde la Expulsión de los Jesuitas de la hegemonía política de Córdoba por la más pujante y dinámica casa de los Allende.

<sup>2755</sup> vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

<sup>2756</sup> clan estrechamente vinculado a la cría y comercialización de mulas con el Alto Perú.

<sup>2757</sup> AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

<sup>2758</sup> *Ibidem*.

<sup>2759</sup> vecino morador de Córdoba, casado con Francisca Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay, y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de José de Ariza (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

---

<sup>2760</sup> hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebreros y Suárez de Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer del Sanjuanino Jose Matías de Torres y Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiola, y de Teresa de la Quintana, mujer de Jose Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102; y FB, 1990, V, 252). Poseía una valiosa biblioteca detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

<sup>2761</sup> General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

<sup>2762</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casó en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León, de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210). El Regidor José de Allende "...azotó privadamente en su casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería, lo que consta de Autos, y que para no experimentar la pena que merecía se compuso con el injuriado en 400 pesos, que le satisfizo por este agravio" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>2763</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casó en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiola y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

<sup>2764</sup> AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

<sup>2765</sup> AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

<sup>2766</sup> *Ibidem*.

<sup>2767</sup> *Ibidem*.

<sup>2768</sup> *Ibidem*.

<sup>2769</sup> *Ibidem*.

---

<sup>2770</sup> Tau Anzoátegui, 1987, 499.

<sup>2771</sup> Autor de Política para regidores y señores de vasallos en tiempo de paz y guerra, y para prelados (Madrid, 1597; Medina del Campo, 1608; y Barcelona, 1818).

<sup>2772</sup> Para una rescensión de Solórzano, ver Mouchet, 1955, 70; Malagón-Barceló y Ots Capdequí, 1965; y Halperín Donghi, 1985, 44-60.

<sup>2773</sup> Levene nos recuerda que Castillo de Bovadilla afirmaba que la costumbre "...hace callar las leyes y reescriptos de los Príncipes". Solórzano y Pereira estimaba que el buen legislador debía acomodar sus preceptos conforme las regiones y las gentes a quienes se refiere (Levene, 1946, I, 98-99). Sobre la costumbre en el derecho indiano, ver Dougnac Rodríguez, 1978; Avila Martel y Bravo Lira, 1984; y Tau Anzoátegui, 1973, 1976, 1986, y 1987. Sobre Castillo de Bovadilla ver Tomás y Valiente, 1982, 179-227.

<sup>2774</sup> Antonio o José Antonio Allende, uno de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue en las inmediaciones de Mendoza, San Luis, y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte (Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende fué exonerado en 1771 de la Administración, tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1). En 1770 José Antonio Allende fue demandado por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15, Exp.8). Era hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes, hija esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano y Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano (Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres.

<sup>2775</sup> "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar).

<sup>2776</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar.

<sup>2777</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29 (expediente sin foliar).

<sup>2778</sup> En 1777 lo demanda por calumnias Carlos Estela (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

<sup>2779</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.145, Exp.29.

<sup>2780</sup> Los Regidores José, Roque y Antonio López de Velazco, y su cuñado Juan José de Paz y Figueroa e Ibáñez del Castrillo.

<sup>2781</sup> Los hermanos Regidores Diego Ignacio, Bartolomé Santos y Miguel de Aráoz y del Campo, hijos de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila, y un hijo del primero Fiel Ejecutor.

<sup>2782</sup> El Alcalde Provincial Diego Martínez de Iriarte, marido de Teodora de Abreu y Figueroa, y su hijo el Alcalde Ordinario Domingo Martínez de Iriarte (Zenarruza, 1991, 340).

---

<sup>2783</sup> El Teniente de Gobernador Estéban de Nieva y Castilla y sus hermanos el Alcalde Provincial Antonio de Nieva y el Fiel Ejecutor Juan Bernardo de Nieva, hijos de Juan Bernardo de Nieva y Castilla y de su esposa, hija del Teniente Gobernador del Tucumán General Juan Antonio de la Vega y Castro. Estéban de Nieva había contraído segundas nupcias con Ignacia Carrizo, viuda de Vega, y poseía las tierras de la comunidad indígena de Guazán, en Andalgalá (Rázori, 1945, II, 459). A su muerte, hereda la estancia Santa Rita de Huasán su nieto el Pbro. Francisco Cubas, un hijo de Francisco Cubas Palacio y de una hija de Nieva, quien las vende al General Luis José Díaz de la Peña, el cual instituye en parte de ellas el famoso Mayorazgo de Guazán, y otra parte dona en 1746 a los Jesuitas.

<sup>2784</sup> El Alférez Real Manuel de Villafañe y Toledo y sus hijos el Alguacil Mayor Luis de Villafañe y Tejeda, el Depositario General Francisco de Villafañe, y el Alcalde Ordinario Ignacio de Villafañe

<sup>2785</sup> Los Regidores Félix Apolinario y José Arias Rengell e Hidalgo Montemayor, y Adrián, Pedro y Antonio Fernández Cornejo.

<sup>2786</sup> Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorri y Tejeda, casado con Rosa Sársfield (LC, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía Dalmacio Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

<sup>2787</sup> equivalente al de Corregidor o Gobernador.

<sup>2788</sup> Bilbaino, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y AN, 1964, 104).

<sup>2789</sup> Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la autoría del *Laudatione Quinque* (Furlong, 1937, 1952).

<sup>2790</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

<sup>2791</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurrealde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del

---

comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

<sup>2792</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiola y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

<sup>2793</sup> Acevedo, 1969, 23 y 117.

<sup>2794</sup> También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la conculada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de Arrascaeta. Fué entónces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la élite cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y los fondos del Convento de San Lorenzo, a la disputa por los despojos de la Compañía de Jesús.

<sup>2795</sup> Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona (García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos (AGN, Leg.70, Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su criada (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior, Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En 1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo (AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.20, Exp.634).

<sup>2796</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>2797</sup> Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de Arriaga.

<sup>2798</sup> hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse, Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras "...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo, que le facilitaba teatro adecuado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>2799</sup> Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293). Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la

---

Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

<sup>2800</sup> marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

<sup>2801</sup> Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (LC, III, 215); con cuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio González, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

<sup>2802</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

<sup>2803</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

<sup>2804</sup> Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y Moyano Aliaga, 1992, 30).

<sup>2805</sup> Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2806</sup> Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era con cuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guillello remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guillello fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2807</sup> Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco, mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora

Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio, desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñoz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de María Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21). Fernando de Arce y Bustillos, tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4, Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco Xavier Garay, se dote sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres (AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires. José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, José Lorenzo Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

<sup>2808</sup> Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

<sup>2809</sup> Hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes, hija esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano y Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano (Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres. Antonio o José Antonio Allende, uno de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue en las inmediaciones de Mendoza, San Luis, y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte (Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende fué exonerado en 1771 de la Administración, tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1). En 1770 José Antonio Allende fue demandado por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15, Exp.8).

---

<sup>2810</sup> Siendo Alcalde Gregorio Arrascaeta "...azotó en la plaza pública a una honrada mujer española por solo haber fingido su mujer Doña María de Allende que la había agraviado en la Iglesia, sobre lo qual siguió el marido de la infamada Autos en la Audiencia de Charcas, y para evadirse Arrascaeta de la condigna providencia que esperaba acalló con dos mil pesos las quejas de la querellante" (AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>2811</sup> José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Leg.2, Sala IX, 5-9-4). Sin embargo, el mismo día Ordóñez escribe al Virrey Cevallos que los Allende omiten decir que la recusación no fué admitida por el Tribunal en que se controvertió "...pues es constante que el Exmo. Sr. Virrey de Lima siéndolo destas provincias declaró definitivamente que de aquellos autos no resultaba cosa que malquistase mi conducta, y confirmando en su consecuencia la elección que la menor parte de votos hizo el citado año, me mandó a posesionar en el empleo de Alcalde de Segundo Voto, el que serví el año de 1774 con aceptación del público" (Juan Tiburcio Ordóñez al Virrey, Buenos Aires, 8-I-1778, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>2812</sup> *Ibidem*.

<sup>2813</sup> *Ibidem*.

<sup>2814</sup> Oficio de Nicolás García Guilledo, Córdoba, 3-II-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>2815</sup> *Ibidem*.

<sup>2816</sup> Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Divorciado de su mujer por culpa de Dionisio Romero, probablemente el mismo que conjuntamente con el Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo provocó un alboroto en Tucumán en oportunidad de la introducción de la Real Renta de Tabaco y Naipes (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez y González (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena, como líder de la facción de los Echenique, el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>2817</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4.

<sup>2818</sup> Juan Antonio de la Bárcena al Virrey Cevallos, Córdoba, 7-XII-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>2819</sup> Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 2-I-1778 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2).

<sup>2820</sup> *Ibidem*.

<sup>2821</sup> *Ibidem*.

<sup>2822</sup> Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de Pobres en 1792.

<sup>2823</sup> Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 6-I-1779 (AGN, División Colonia,

<sup>2824</sup> Hijo de Félix Cabrera Celis de Burgos y de María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, nieto paterno de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y nieto materno de Juan Antonio de Zeballos. Casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, era concuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, y de Ambrosio Funes; y primo segundo de José Prudencio Xixena y Céliz de Burgos. Nicolás era padre de José Antonio Cabrera y Allende, casado con Dolores de Gastañaduy, hija del Teniente Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de Alcántara Prudencio María de Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina, 1966, 62). Padeció en vida un extenso litigio con Joaquín de Buena Maysón, por las tierras nombradas El Ancón, conocidas como el Horno de Don Félix (AHC, Escribanía N.3, Leg.41, Exp.14). Sobre las luchas de familia y de clanes, ver Aguiar de Costa Pinto, 1949; y Marques, 2002.

<sup>2825</sup> Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas Ximénez, Juan Antonio Egusquiza, Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro, Manuel Antonio Warnes, Manuel Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan José Viana, Xavier Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavía, Domingo de Basavilbaso, José de San Pedro Lorente, Domingo de Vea y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri, Francisco Segurola, Tomás de Valansátegui, y Julián Hernández Barruso. (AGN, Protocolos, Registro 2, 1753, fs.230v., 226v., 225v., 220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5, 1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4, 1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756, fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2, 1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759, fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4, 1759, fs.351v.; R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4, 1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762, fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.; R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4, 1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v., 330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764, fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765, fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342; R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v., 103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.; R.6, 1768, fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773, fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773, fs.248v., 278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774, fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y 402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.)

<sup>2826</sup> Criado en Sevilla, sobrino de Francisco Cobo (Córdoba, 10-III-1784, AGN, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5), y primo del comerciante Miguel Laguna. Juan López Cobo se casó con Damiana Figueroa Mendoza, hija del Maestre de Campo Juan Jacinto Figueroa Mendoza y Cabrera, y de Leocadia de Ceballos y Suárez de Cabrera. Eran padres de Marquesa López Cobo, desposada en 1812 con Melchor Ferrer y Xivixel, hijo de Juan Bautista Xivixel y Caminada y de Gertrudis Xivixel (LC, II, 379). Damiana Figueroa era a su vez cuñada de Pedro de Argañaráz Villafañe, Francisca de Usandivaras y Allende, y de Bernardina de Zamudio Echenique (Calvo, 1936, I, 240ss.). Un Antonio López Cobo se había casado con Ana María Correa, viuda de José Domingo Cabral, vecino del Río Tercero (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15). Don Antonio López Cobo, Juez Pedáneo del Río Tercero, preso en Córdoba, fué presumiblemente asesinado en Diciembre de 1795 por Faustino García (Marcelino Moyano al Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires, Córdoba, 18-XII-1795, AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.249, Exp.76). Se le abre auto sucesorio en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15).

<sup>2827</sup> Fenómeno que ha sido relatado en otros trabajos del autor.

<sup>2828</sup> Casó con María Mercedes Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiolaza, y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de José de Allende y Losa. María Mercedes era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí, y era cuñada de Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició un sumario para averiguación de su proceder como Teniente de Oficiales Reales (AHC, Crímen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia le inició un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por contrabandista (AHC, Crímen, 1769, Leg.22, Exp.15)

<sup>2829</sup> padre del Coronel Santiago Alexo de Allende, quien se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a

las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]).

<sup>2830</sup> Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). Bautizado en Velbis de la Jara, Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de Catalina García de las Heras, y casado con María Eugenia Arias de Cabrera, hija del Cap. Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo. Era concuñado del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente (Espejo, 1967, 444). Bernabé Gregorio de las Heras era hermano de María Gregorio de las Heras (mujer de Juan de Tejerina, y madre de Gregorio Tejerina y Gregorio de las Heras, marido de Josefa de Usandivaras y Allende); y de Bernardo Gregorio de las Heras, bautizado en Velbis en agosto de 1749, Alférez Real de Buenos Aires en 1773, Regidor, Defensor de Menores, Tesorero en 1783, casado con María Rosalía Ursula de la Gacha, hija de Juan Ignacio de la Gacha, nacido en la Villa de Guetaria, Guipúzcoa, y de Juana María de Rojas y Acevedo. Don Bernardo era el padre del prócer de la independencia de Chile General Juan Gualberto Gregorio de las Heras (LC, II, 15 y 20; FB, 1988, III, 99).

<sup>2831</sup> Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1778 y 1781; era hermano de Antonio Manuel Gonzalez de Acosta, casado con María Rosa Espeche y Herrera, padres de María Salomé Gonzalez Espeche, mujer del Teniente Gobernador de Catamarca Nicolás Avellaneda y Tula, padre a su vez del Mártir de Metán Marco Avellaneda (Calvo, 1936, I, 108). También era hermano de Francisco José González de Acosta, yerno del Coronel Francisco Antonio González, casado con Teresa González de Villarroel (Datos proporcionados por el Investigador Carlos Jáuregui).

<sup>2832</sup> Los cuatro concuñados estaban casados con cuatro hermanas Arias de Cabrera, hijas del Capitán Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, herederos de la estancia San Javier en el Valle de Traslasierra (Mayol Laferrere, 1975). Al Capitán Juan Luis Arias de Cabrera le fué otorgada en 1780 una merced de tierras en el Puesto de las Animas (AHC, Escribanía N.2, Leg.59, Exp.6).

<sup>2833</sup> Las Heras llevaba contraídas entre 1766 y 1804 una treintena de transacciones crediticias con Juan Tomás Echever, Domingo Belgrano Pérez, Pablo Ruiz de Gaona, Domingo de Basabilbaso, Manuel del Arco, Felipe Santiago del Pozo, Diego Casero, José de San Pedro Lorente, Pedro Manuel Beruti, Ventura L. Lorente Romero, Manuel Antonio Barquin, Gaspar de Santa Coloma, Tomás de Valansátegui, Juan José Lezica, Casimiro Francisco de Necochea, Cristóbal AVECILLA, Martín de Alzaga, y Diego de Agüero, por la suma total de \$163.969 (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.35v.; R.6, 1766, fs.47; R.2, 1767, fs.248, 222, y 256v.; R.3, 1767, fs.254v.; R.5, 1767, fs.294; R.2, 1768, fs.222v.; R.6, 1768, fs.273, y 275; R.3, 1774, fs.520v. y 466v.; R.5, 1774, fs.201; R.6, 1774, fs.339; R.3, 1776, fs.305v.; R.5, 1778, fs.47; R.1, 1782, fs.337; R.6, 1782, fs.186; R.1, 1783, fs.321; R.4, 1783, fs.353v.; R.6, 1784, fs.259; R.4, 1786, fs.259 y 263v.; R.6, 1786, fs.35 y 45v.; y R.3, 1804, fs.192).

<sup>2834</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.145, Exp. 29.

<sup>2835</sup> *Ibidem*.

<sup>2836</sup> *Ibidem*.

<sup>2837</sup> Sus acreedores fueron en orden cronológico Pedro de Lea, Joseph Vienne, Manuel Escalada, y Francisco José Díaz Vélez (AGN, Protocolos, Reg.2, 1748, fs.58v.; R.4, 1748, fs.53; R.4, 1749, fs.138; R.5, 1771, fs.203; R.5, 1790, fs.297v.)

<sup>2838</sup> Entre sus acreedores figuraban en orden cronológico María Josefa Balbastro, Domingo Basabilbaso, José Antonio Ibáñez, Martín Olazábal, José Antonio Irigoyen, Manuel Sarratea, Agustín Casimiro de Aguirre, Manuel Escalada, Vicente Azcuénaga, Matías de Abaroa Barrena, Bernardo Sancho Larrea, y Francisco Ignacio de Ugarte (AGN, Protocolos, Reg.4, 1761, fs.33v.; R.2, 1761, fs.20; R.2, 1764, fs.331v., 313v., y 304v.; R.2, 1767, fs.70, 228, 192v., 212 y 182v.; y R.6, 1767, fs.210 y 346; R.3, 1771, fs.130v.; R.5, 1771,

---

117v., 134, y 141; R.6, 1771, fs.143 y 159; R.3, 1773, fs.214; R.4, 1773, fs.503 y 507v.; R.5, 1773, fs.190v.; y R.6, 1773, fs.291, 285v., y 254.)

<sup>2839</sup> vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

<sup>2840</sup> Levillier (1915), reeditado por Segreti (1973).

<sup>2841</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

<sup>2842</sup> *Ibidem*.

<sup>2843</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>2844</sup> Probablemente pariente del Comandante de Armas de Tarija Luis Hurtado de Mendoza. Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita Ledesma, cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima política del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).

<sup>2845</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>2846</sup> Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964, 104).

<sup>2847</sup> General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

<sup>2848</sup> Español, casado con María del Carmen Alborno y Carranza, hija de José de Alborno y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiola; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

<sup>2849</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>2850</sup> *Ibidem*.

<sup>2851</sup> Alcalde de Segundo Voto de Córdoba. Natural de Lima, Gobernador de Armas de Santiago del Estero, casado con Polonia Hernández de León, hija de Juan Hernández de León y de Francisca Pérez y Calderón; padres de Andrea del Castillo, mujer de Hilario Lazcano y Usandivaras, y de Manuel Antonio del Castillo, marido de Francisca Funes; y suegro de Lorenzo Recalde y Cano (LC, I, 263; Buscá-Sust, 1981, 80). Debe tenerse en cuenta que Antonio del Castillo se opuso al casamiento de su hijo Manuel Antonio del Castillo con Francisca Funes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1788 interpone un recurso por no conformarse en el puesto de Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.58, Exp.32).

<sup>2852</sup> Este había actuado también como Alcalde ordinario diez años antes, en 1779, y más luego como Defensor de Pobres en 1792. Sin perjuicio de sus actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un fuerte giro mercantil, alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y Buenos Aires por valor de \$286.327. Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas Ximénez, Juan Antonio Egusquiza, Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro, Manuel Antonio Warnes, Manuel Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan José Viana, Xavier Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavía, Domingo de Basavilbaso, José de San Pedro Lorente, Domingo de Veá y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri, Francisco Seguro, Tomás de Valansátegui y Julián Hernández Barruso (AGN, Protocolos, Registro 2, 1753, fs.230v., 226v., 225v., 220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5, 1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4, 1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756, fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2, 1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759, fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4, 1759, fs.351v.; R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4, 1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762, fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.; R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4, 1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v., 330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764, fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765, fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342; R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v., 103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.; R.6, 1768, fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773, fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773, fs.248v., 278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774, fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y 402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.). Litigó en 1763 con José I. Arcos, en 1768 con Juan J. Argüello, en 1769 con Felipe Delgado, en 1769 con Ramón Gaetán, en 1782 con José Galarza, en 1783 con Francisco del Signo (AHC, Escribanía N.1, Leg.4, Exp.15; Leg.361, Exp.2; Leg.362, Exp.2; Leg.364, Exp.7; Leg.399, Exp.11; y Leg.400, Exp.1)

<sup>2853</sup> Hijo del Maestre de Campo José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiola, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiola; y de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>2854</sup> Hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebreros y Suárez de Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer de José Matías de Torres y Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiola, y de Teresa de la Quintana, mujer de José Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102). Poseía una valiosa biblioteca detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

<sup>2855</sup> Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allende y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y Zúñiga, de José Cipriano de Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas (Calvo, I, 36; y III, 56).

<sup>2856</sup> Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Tuvo una confusa actuación en la rebelión comunera de Traslasierra de 1774 (Barrionuevo Imposti, 1968). Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15).

<sup>2857</sup> Originario del lugar de Arredondo, partido judicial de Ramales, provincia de Santander (García Carraffa, X, 39). Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa

---

Fé, y de María Polonia Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última cuando viuda vuelve a casar con José de Allende y Losa. María Polonia Ascasubi era hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León; hermana de María Isidora Ascasubi, mujer del General José de Allende y Losa; y prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN, 1967, 87). Y era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas.

<sup>2858</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13, citado por Mariluz Urquijo, 1987, 282.

<sup>2859</sup> AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

<sup>2860</sup> *Ibidem*.

<sup>2861</sup> *Ibidem*.

<sup>2862</sup> Hijo de Nicolás de Cabrera y Ceballos y de María Tomasa de Allende, casado con Dolores de Gastañaduy, hija del Teniente Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de Alcántara Prudencio María de Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina, 1966, 62).

<sup>2863</sup> AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

<sup>2864</sup> Coronel, Comandante General de Armas, Alcalde de Primer Voto, Gobernador-Intendente Interino en 1810, hijo de José Antonio de Allende y Argüello y de Catalina Moyano Cabrera, contrajo matrimonio con Trinidad Martínez de Bethencourt (LC, 1969, III, 195; y Calvo, 1936, I, 59).

<sup>2865</sup> Hombre de pensamientos revolucionarios que emigró a España antes de la Revolución. Hijo de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano mayor de los Coroneles Tomás Baylón y Faustino de Allende, y primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la Bárcena. José Manuel Allende estaba casado con Teresa de la Quintana y Allende, hermana de la mujer del Coronel Santiago Allende. También era primo segundo de la madre del General José María Paz, y primo tercero del Coronel Dalmacio Allende.

<sup>2866</sup> El Cabildo de Córdoba al Virrey Joaquín del Pino, Córdoba, 1801 (AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.15).

<sup>2867</sup> *Ibidem*.

<sup>2868</sup> Sistema electoral por el cual en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se elegía simultáneamente como alcaldes de primero y segundo voto a un criollo y un peninsular, que en la práctica equivalía a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. Tiene sus antecedentes en el siglo XVII, en los Cabildos seculares, cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos, por lo general peninsulares (Doucet, 1974, 383); y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955; González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166).

<sup>2869</sup> semejante al Programa impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías étnicas y conocido por algunos con el título de Acción Afirmativa y por otros por discriminación inversa (ver Walzer, 1993, 159).

<sup>2870</sup> Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver Reynolds, 1992; y Lipset, 1992.

<sup>2871</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos

---

solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>2872</sup> La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

<sup>2873</sup> Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorri y Tejeda, casado con Rosa Sársfield (Lascano Colodrero, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía Dalmacio Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

<sup>2874</sup> equivalente al de Corregidor o Gobernador.

<sup>2875</sup> Bilbaino, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y Allende Navarro, 1964, 104).

<sup>2876</sup> Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la autoría del *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952).

<sup>2877</sup> Teniente Corregidor de Quispichanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

<sup>2878</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

<sup>2879</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiola y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

---

<sup>2880</sup> Acevedo, 1969, 23 y 117.

<sup>2881</sup> También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la concuñada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de Arrascaeta. Fué entonces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la elite cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y los fondos del Convento de San Lorenzo, a la disputa por los despojos de la Compañía de Jesús.

<sup>2882</sup> Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona (García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos (AGN, Leg.70, Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su criada (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior, Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En 1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo (AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.20, Exp.634).

<sup>2883</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>2884</sup> Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de Arriaga.

<sup>2885</sup> hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse, Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras "...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo, que le facilitaba teatro adecuado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>2886</sup> Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293). Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

<sup>2887</sup> marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

<sup>2888</sup> Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río

---

Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (LC, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio González, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

<sup>2889</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

<sup>2890</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

<sup>2891</sup> Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y Moyano Aliaga, 1992, 30).

<sup>2892</sup> Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2893</sup> Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilleto remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilleto fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2894</sup> Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco, mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio, desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñoz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de Maria Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21). Fernando de Arce y Bustillos, tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4, Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco Xavier Garay, se doten sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División

Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres (AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires. José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, José Lorenzo Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

<sup>2895</sup> Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

<sup>2896</sup> Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

<sup>2897</sup> acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

<sup>2898</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

<sup>2899</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

<sup>2900</sup> Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

<sup>2901</sup> Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16).

<sup>2902</sup> Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque Colombes, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

<sup>2903</sup> casado con María de la Concepción del Moral.

<sup>2904</sup> Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera, con cuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

---

<sup>2905</sup> Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V. Gonsález.

<sup>2906</sup> Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

<sup>2907</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

<sup>2908</sup> Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

<sup>2909</sup> Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina del General Andrés Ortíz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fué educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias locales.

<sup>2910</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

<sup>2911</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

<sup>2912</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortíz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna (Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

<sup>2913</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

<sup>2914</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>2915</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>2916</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortíz de Ocampo.

<sup>2917</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

<sup>2918</sup> Córdova, 1972, 274.

<sup>2919</sup> Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1718 el Cabildo resuelve que el Alguacil Mayor notifique a "...los indios, mulatos, y mestizos zapateros, sastres, y carpinteros para que baian a segar trigo a las chacras pena de que seran castigados con todo rigor y también que se les obligue a que traigan boleta de la persona con que hubieren segado". El 24 de diciembre de 1720 hay citación general "...para que tomen parte en la siega a los negros, mulatos libres, mestizos, zapateros, sastres, y carpinteros que no fueren españoles para que ayuden a ella y en particular a las pobres viudas. Cometieren esta diligencia a dicho Sr. Alguacil Mayor para que los cite para el 30 de diciembre que ocurran a esta sala para repartirlos". El 12 de enero de 1752 y el 11 de diciembre de 1792 el alcalde de primer voto y el síndico procurador general, respectivamente, propusieron que en atención a ser tiempo de siega y que por falta de gente que hay en las chacras para el trabajo y por esta causa se pueden perder los trigos, se le suplique al Sr. Gobernador mande romper bando, para que cesen todas las obras, y oficios que hay en esta ciudad, y que so pena de meses de presidio les compela a todos salgan a

---

trabajar en las cosechas" (Halperín Donghi, 1961, 38).

<sup>2920</sup> ver Pastore, 1990 y 1991.

<sup>2921</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes, para circular de pago en pago, la cual perduró legalmente hasta Caseros.

<sup>2922</sup> otorgadas por el Consejo de Gracia y Justicia del Consejo de Indias.

<sup>2923</sup> ver Saguier, 1994c.

<sup>2924</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

<sup>2925</sup> Entre Levene (1927) y Muñoz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada en que el primero sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de una trayectoria secular, mientras el segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de un proceso" (Muñoz Pérez, 1947, 618; y Levene, 1952, 229). Debo la referencia de este debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

<sup>2926</sup> Socolow, 1987, 106.

<sup>2927</sup> Ravignani, 1937, I, 49.

<sup>2928</sup> Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

<sup>2929</sup> Para el conocimiento de la noción de metanastasis, ver Meabe, 2004.

<sup>2930</sup> ver Vives (1986); McGarry y O'Leary, 1993, citado en O'Leary, 2000, 101; y Taylor, 2000, 266-267. Para las reformas borbónicas vistas desde la frontera, ver Ortelli, 2005.

<sup>2931</sup> ver Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991).

<sup>2932</sup> ver Anderson, 1983, 1993.

<sup>2933</sup> ver Lefort, 1990, 140 y 162; von Beyme, 1995, 180 y 326; Castoriadis, 2003, II, 30; y Poltier, 2005, 42-45.

<sup>2934</sup> ver Cotta, 1988.

<sup>2935</sup> ver Caillet-Bois, 1929 y 1939; Maniquis, et. al., 1989 ; y Halperín Donghi, 1972, 1979.

<sup>2936</sup> ver Pagden, 1997, 234. y 237.

<sup>2937</sup> ver Williams, 1996. Sobre el conocimiento que Juan Baltasar Maziel tuvo del escritor e historiador Peruano Pedro de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

<sup>2938</sup> Luego del informe de Pedro Peralta y Barnuevo la Universidad de San Marcos, dominada por la escolástica, aceptó en 1723 la teoría de la circulación de la sangre descubierta casi cien años antes (1628) por el médico inglés William Harvey (Barreda Laos, 1964, 209).

<sup>2939</sup> Sánchez, 1967; Choy, 1985, 59; Zamora, 1988; y Buaas, 1994. Sobre los préstamos tomados por Fr. Benito Feijóo de la obra de Pierre Bayle, ver Bahr, 2006. Sobre la influencia de la mitología clásica en la literatura hispanoamericana colonial, en especial los casos de Venezuela y Colombia en el siglo XVIII, ver Vilanova, 1999.

<sup>2940</sup> Halperín Donghi, 1993, 746.

---

<sup>2941</sup> Subirats, 1994, 465.

<sup>2942</sup> Sobre la extensión de la ciudadanía romana, ver Appiah, 2007, 313.

<sup>2943</sup> Sobre la transculturación en el mundo colonial peruano, ver Cornejo Polar, 2000; y ver asimismo el capítulo 1 del tomo primero de la presente obra. Sobre la fiesta barroca en la ciudad de Lima, ver Ramos Sosa, 1997. Para una antropología del juego y el pasaje del toreo aristocrático a caballo al toreo popular a pié, ver González Alcantud, 1993: Sobre la cuestión de la educación de las elites indígenas en los Andes, ver Alaperrine-Bouyer, 2002 y Burns, 2002. Sobre la iglesia y el poder social de la nobleza indígena cuzqueña, siglo XVIII, ver Garret, 2002. Sobre la ordenación de indios en Lima a mediados del siglo XVIII, ver O'Phelan Godoy, 2002. Para el Protector de Naturales y la asistencia jurídica privada a los señores indígenas ante la Real Audiencia de Lima, ver Honores, 2003.

<sup>2944</sup> Grosso Lorenzo, 2004, 44.

<sup>2945</sup> Entre los puritanos escoceses que arribaron con el Real Asiento se encontraba Guillermo Ross, abuelo materno de Francisco Ramos Mexía y de Juan Galo de Lavalle.

<sup>2946</sup> Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima. Protector de los contrabandistas de la Colonia del Sacramento (Carbonell, 1992, 276). Testigo del matrimonio de Blas Gascon con Tomasa de Arce y Báez, viuda de Juan de Vargas Macías (JR, 1989, ítem 4241). Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflores, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de *El borracho burlado* (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

<sup>2947</sup> Entre otros imputados, el Diputado del Comercio Francisco Pérez de Saravia fué acusado por Ceballos de contrabandista, pues habiendo llegado a Buenos Aires en calidad de criado del Gobernador Andonaegui "...no tuvo otro ejercicio que el de contrabandista, con tanto exceso y descaro, que con dificultad tendría ejemplar". También fué acusado de haberse quedado en su calidad de albacea con los bienes de la testamentaria de Juan Antonio de Alquirote. Fué condenado en 1766 a ser confinado a la Isla de la Piedra (Barba, 1978, 224; y 1980, 60). En 1767, Juan Conde declaró que "...deseando quitar los remordimientos de su conciencia y que no le coja la muerte sin hacer lo que debe como buen cristiano, ha determinado declarar que en la causa que al Cap. de Infantería Francisco Pérez de Saravia le hizo el Exmo. Pedro de Cevallos suponiéndole muchos delitos y haciéndole padecer una rigurosa prisión, entre otros testigos que fueron solicitados fué uno el compareciente en los términos que va a referir, movido de su conciencia y sin que para hacerlo tenga otra idea que el sosiego de su espíritu= a los dos días...de la prisión del referido Don Francisco le dixo Don Pedro Ximénez que Don Roque de San Martín le llamaba como así fué... a su casa en la cual el citado San Martín expresó, como el había sido empeño con su...mencionado Conde saliese de la prisión de la ciudad de Montevideo de donde acababa de llegar, y que era preciso fuese a dar una declaración contra dicho Saravia a la quinta donde estaba S.E. y que sino lo hacía conforme quería y era gusto de S.E. se echaba a perder todo lo que había trabajado a su favor, y volvería a estar preso en Montevideo, instándole para que lo ejecutase, porque así le convenía, y como no tenía ninguna cosa que decir contra el referido Saravia se fué afligido y comunicó lo que le pasaba al citado Ximénez, quien le consoló y expresó que podía ir, pues ya el había asegurado que el mencionado Conde no sabía cosa alguna de lo que se solicitaba y así se encaminó a la Quinta donde estaba S.E. el que lo recibió con grandes cariños y empezó a proponerle que el mencionado Saravia era un hombre muy malo, relacionando muchísimos delitos de amancebado, escandaloso, de contrabandos y de pleitos y enredos, diciendo que tenía escandalizada y alborotada la ciudad, con otras infinitas cosas que le dijo asegurándole que todas ellas la sabía el referido Conde y las ha de declarar porque así era preciso, mostrando la mayor pasión y enojo contra el citado Saravia y que si el declarante le daba gusto en ello, lo había de perder para siempre, y en medio de tan terribles amenazas, le respondió que no sabía nada de lo que S.E. le preguntaba y decía, pidiéndole que por amor a Dios se apiadase de él, y luego S.E. pasó a preguntarle y decirle que el citado Saravia se carteaba con el Sr. Brigadier José Joaquín de Viana, y que...también se mezclaba en contrabandos, y a esto le respondió lo mismo, de que era falso, y ultimamente le aseguró que Saravia había sido introductor de un contrabando que el año de sesenta se descargó por el Bajo, y dueño de unos cueros de una lancha que embargó Don Alonso Cerrato en las Barrancas del Riachuelo de esta Ciudad y que era preciso lo dijese. Y habiéndole dicho Sr. de esa hacienda eran dueños otros y Don Francisco Saravia no tenía en ella nada. A lo que replicó S.E. de nadie quiero saber sino asegurarle a ese pícaro de Saravia todo lo qual pase entre S.E. y dicho Conde, en la sala de su habitación, ofreciéndole que no se sabría mandándole fuese a una... que está en el corredor de dicha quinta, en el que se hallaba solamente Don Pedro Medrano, quien le previno que tenía que declarar y que lo hiciese interrogándole por un pliego de papel

---

escrito con muchas preguntas, a todas las cuales respondió que no sabía, y hace memoria que también le preguntó por el contrabando que va dicho, de la hacienda que el año de sesenta se descargó por el Bajo, y de los cueros que el mismo año embarcó en una lancha Cerrato, y a estas dos preguntas respondió que era verdad, que dicho Saravia fué conciente; pero que en la Hacienda creía no tenía interés ni que se había puesto en su casa, cosa alguna de ella; porque sabía y le constaba al declarante, que su dueño era Don Manuel de Abarrategui y otros que introdujeron y llevaron a esconder por la calle de Santo Domingo para arriba, y los Cueros bajaron los Oficiales Reales, y mandaron que con su guía siguiese a un Navío de Registro de Don Manuel de Borda para donde hiban, no teniendo en uno ni otro el mencionado Saravia intervención; pues solo se ocupaba en saber por el declarante y por otros lo que hacían los portugueses en las Murallas de la Colonia y la tropa y municiones que venía a ella; a todo lo qual fué escribiendo dicho Medrano, como que allí no había otra persona,...debe confesar que es falso que dicho Saravia fuese conciente de lo cual desde luego se retracta; pues se lo dijo así, fué temeroso de las amenazas que le hizo S.E. y por no volver a padecer más prisiones. Asimismo confiesa que desde el año de cinquenta, que entró de corsario contra el Comercio ilícito de este Río, armado por el Sr. Gobernador de Montevideo don José Joaquín de Viana, conoce al expresado Don Francisco Pérez de Saravia y no le ha ocupado ni oído decir se mezcle en contrabandos (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.71-73).

<sup>2948</sup> Acevedo, 1972; Marilúz Urquijo, 1987, 47-83; y Tjarks, 1962.

<sup>2949</sup> Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

<sup>2950</sup> Acevedo, 1972, 259.

<sup>2951</sup> Marilúz Urquijo, 1987, 77.

<sup>2952</sup> Barba, 1978, 95.

<sup>2953</sup> Marilúz Urquijo, 1987, 78-80.

<sup>2954</sup> Cuando los Mercaderes de Plata de Potosí defraudaron las expectativas de las burocracias periféricas el control del Situado respectivo cambiaba de manos (Saguié, 1989, 287-317).

<sup>2955</sup> Capitán de Milicias de Caballería, Tesorero Mayor de la Iglesia Catedral. Nació en Villa de Orozco, Vizcaya, hijo de Domingo de Basavilbaso y Mujica y de María Rosa de la Presa y Ereyrosa; marido de María Ignacia de Ortubia y Toledo; suegro de Vicente de Azcuénaga, Pascual Ibáñez de Echavarry, Domingo Ignacio de Urien, y José Ignacio de Merlos (Fernández de Burzaco, I, 245; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 2272). Con su hijo Manuel, Marcos José de Riglos y Juan Gregorio de Zamudio figura entre los que deponen contra la Compañía de Buenos Aires, formada por Francisco de Mendinueta, Pedro de Astruarena e Iturralde, y José de Aguirre y Acharán, en la Información levantada por el Cabildo de Buenos Aires (Mariluz Urquijo, 1989, 128).

<sup>2956</sup> Nacido en Portugalete, Vizcaya, hijo de Miguel de Larrazábal y de María Antonia de Basualdo; marido de Agustina Avellaneda, porteña, hija de Gaspar de Avellaneda y de Juana de Labayén; y suegro de Martín José de Echauri, Juan de Otárola, José Antonio Iturriaga, José Fernández, el Gobernador de Tucumán Gerónimo Matorras, Martín de Arráiz y Pablo de Aoíz (FB, 1989, IV, 113 y 298; y JR, 1987, ítem 1415).

<sup>2957</sup> natural de Cartagena; hijo de Patricio Benito Warnes y de Juana María Durango; sobrino de Adrián Pedro Warnes y Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de

---

Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; con cuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro del Capitán Carlos Joaquín Vivero, de Juan José Ballesteros, del Dr. Bernardo Campusano, del Teniente de Navío Baltasar Unquera, de Joaquín Prieto y Vial, y de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca de Warnes y Arráez (FB, I, 162 y 214; II, 48; III, 153; V, 243; y VI, 213 y 295; y JR, 1989, ítem 5246).

<sup>2958</sup> Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, Síndico de los Conventos de San Francisco y Monjas Capuchinas, nacido en Villa de Cabra, Andalucía; hijo de Diego Rodríguez de Vida y de Josefa de Mendoza y Palomeque; marido de Josefa Navarro, nacida en Córdoba, hija de Luis Navarro y Petrona Meneses; padre de Francisco Javier Rodríguez de Vida; y suegro de José de Astuena, Manuel Alfonso de Sanginés, María Josefa de Roo y Cabezas y María de la Concepción Conget y Giles Bravo (FB, V, 391-392; y JR, 1987, ítem 2145; y 1989, ítem 5469).

<sup>2959</sup> Hijo de Juan de Lezica y de María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de María Elena de Alquiza y Peñaranda; suegro de Manuel Joaquín de Zapiola, Francisco Seguro y Pablo Ruiz de Gaona; tío carnal de Juan Antonio de Lezica y Ozamiz, quien fuera marido de Rosa de la Torre Tagle; y tío político de José de Endeyza y Alvear y de Francisco Javier de Riglos (Cortabarría, 1987, 53-96; y FB, IV, 144).

<sup>2960</sup> Hijo del Capitán Francisco Bazurco, natural de Motrico, Guipúzcoa, y de Juana María de Herrera y Labayén; hermano del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco; y cuñado de Ana Rodríguez de las Varillas (FB, I, 252; y JR, 1987, ítem 1128).

<sup>2961</sup> muchas más transacciones que no fueron registradas notarialmente se podrían hallar si se rastrearan los poderes especiales para cobrar librados por los comerciantes porteños.

<sup>2962</sup> Exactamente tengo registrados 183 comerciantes gaditanos, en el Apéndice A-I, de un trabajo inédito del autor, titulado "La Articulación comercial del espacio colonial Rioplatense. Las presiones mercantiles y el Reparto Forzoso".

<sup>2963</sup> Tinoco Rubiales, 1982, 273.

<sup>2964</sup> Sobre la escolástica virreinal peruana: el P. Leonardo de Peñafiel, ver Hampe Martínez, 1999. Sobre el apoyo estatal a la ciencia en el imperio español tardío, ver De Vos, 2006.

<sup>2965</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann Villena, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

<sup>2966</sup> "...caminando en coche anduvo la Provincia que abraza sobre 400 leguas en 23 días, en cuyo viaje, como dijeron varios, ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20 años; pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en cargar el coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras, trabajo, herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>2967</sup> Learte, 1926, capítulos XIII y XIV.

<sup>2968</sup> Bidondo, 1983.

<sup>2969</sup> Acevedo, 1969, 98.

---

<sup>2970</sup> Dueño de Campo Santo, introducido de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (AC, 1972, 20).

<sup>2971</sup> Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14).

<sup>2972</sup> Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

<sup>2973</sup> Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silípica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (CC, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre.

<sup>2974</sup> Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid]" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>2975</sup> Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y María Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969).

<sup>2976</sup> Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (CC, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre,

---

1911; CC, I, 71; y Cutolo, I, 191).

<sup>2977</sup> Alcalde Provincial de la Ciudad de Tucumán (AGN, Justicia, Leg.12, Exp.268). Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5); marido en primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y en segundas nupcias, en 1758, de Clara de Paz, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel La Madrid; y tío político de Cayetano Rodríguez y de Cayetano Fernández Moure (Avila, 1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, ítem 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

<sup>2978</sup> Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con María Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina (Corominas, 1987, ítem 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83)

<sup>2979</sup> Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986, 140.

<sup>2980</sup> Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Manuel López y de María Ríos, casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira). Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214).

<sup>2981</sup> Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado en 1760 con Teresa Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo, concuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro del poeta popular Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, ítem 204; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 399). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

<sup>2982</sup> hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima hermana María Josefa Goncebat y Paz, hija de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con Plácida Mariño Castro.

<sup>2983</sup> AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

<sup>2984</sup> Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le mandaba expulsar a los Jesuitas (Acevedo, 1969, 110). Carecía de vínculos de parentesco con familias locales. Para más detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

<sup>2985</sup> Hijo de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí. Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime y de Teresa Ponce de León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y concuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

<sup>2986</sup> Hijo de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27). Casado con Petrona Garay (Allende Navarro, 1964, 85), padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Cornejo, hijo este último de José Lorenzo Moyano Cornejo y de Antonia Pacheco y Agüero (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Francisco Armesto y Allende

era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su hijo Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

<sup>2987</sup> Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y de María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiola y del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Felipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán, mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27; y CC, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de Medina, y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro y Liria (AN, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>2988</sup> En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión (AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

<sup>2989</sup> Nacido en Nájera, La Rioja; y casado con María Josefa Bustillo de Zevallos, hija del Capitán Ignacio Bustillo de Zevallos y de Ana Domínguez Ravanal. Era según Fernández de Burzaco compadre del Gobernador Gerónimo Matorras, y según Acevedo (1969), primo de Matorras (FB, II, 135; y IV, 138; y Acevedo, 1969, 210).

<sup>2990</sup> abogado de la Real Audiencia de Charcas. Fué acusado por Sabina Sorate, viuda de Francisco Pérez de Saravia, de manejar por medio de los religiosos de la Compañía de Jesús "...los negocios más arduos de aquel gobierno, siendo hombre de tan perversas inclinaciones y de tanta audacia que tuvo el atrevimiento de trabajar un folleto [replicado por el Provisor del Obispado Juan Baltasar Maziell] intentando demostrar que los señores Reyes de España no eran legítimos soberanos de los Pueblos de Indios del Uruguay, y que por esta causa no pudo el Rey Fernando VI cederlos a la corona de Portugal" (Barba, 1978, 226; y AGN, Sala IX, Criminales, Leg.5, Exp.11, fs.22-26). El motivo principal de su salida de Charcas "...fue el de haber llegado a traslucir los Sres. Don Francisco Xavier de Palacios y Pheliz de Llano, Oidores desta Audiencia, el descubrimiento de varias confianzas que tuvieron del dicho Rocha por la satisfacción con que le trataban (especialmente el Sr. Llano que fue su compañero en la familia del Difunto Sr. Arzobispo Don Agustín Rodríguez), lo que le hizo tan odioso que recelando Rocha lo perseguirían luego que se supiesen sus declaraciones hechas en la pesquisa que actuó el Sr. Presidente Don Francisco de Pestaña contra los Ministros [de la Real Audiencia de Charcas] de Orden de Su Majestad dispuso su viaje para el distrito de la Audiencia de Chile, que dirigió después a Buenos Aires, adonde lograba una estimación que nunca tuvo en la Ciudad de La Plata, y especialmente su mujer por ser de vil clase e hija de un Notario Eclesiástico Jose de Arteaga" (AGN, Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.4).

<sup>2991</sup> Oficial Real de las Reales Cajas, nacido en Navarrete, Logroño; hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de Otárola; marido en primeras nupcias de Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en segundas nupcias de Victoriana Cabrera, hija de Francisco Cabrera y de Antonia de Saavedra; padre del Obispo de Buenos Aires Mariano Medrano; compadre de Martín de Sarratea, Mateo Ramón de Alzaga, el Alférez A. Jaramillo, Manuel Gutiérrez, Francisco Cabrera, y Bernardo Sancho Larrea; y suegro de José María Romero (FB, IV, 309; y JR, 1989, ítem 5207).

<sup>2992</sup> nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, hijo de Pedro de Gainza Mendizábal y de Teresa de Luysa; sobrino de Agustín de Leyza, y marido de María Teresa de Eguía y San Martín, hija de Juan de Eguía y de Gerónima Isabel de San Martín (FB, II, 273; y III, 103).

<sup>2993</sup> marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio San Martín y de María Rosa Avellaneda; y compadre de Antonio de Larrazábal, Juan de San Martín y Pedro de Lea (FB, II, 273).

<sup>2994</sup> Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de

---

Santiago de Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:

a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;  
y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, sobrina del Gobernador y luego Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, y en segundas nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoiz (FB, II, 285 y 286)

<sup>2995</sup> Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y de Antonia Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (FB, I, 326); y tío carnal de José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y Pinto, la hija del Maestre de Campo Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

<sup>2996</sup> Caballero del Hábito de Santiago, natural de Monein, Bearne, Bajos Pirineos; hijo de Pedro de La Sala y de María de Bachaulet; marido de Juana Agustina Fernández de Larrazábal, hija de Juan José Fernández de la Cruz y de Manuela Ursula Francisca de Larrazábal; sobrino político de José Antonio de Iturriaga; y suegro de Miguel Fermín de Riglos y de Ramón de Oromí (FB, IV, 116; y V, 78; y JR, 1989, ítem 4316).

<sup>2997</sup> Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan de Eguía y de Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

<sup>2998</sup> Hijo o sobrino del rico comerciante Melchor García de Tagle. Fué Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Buenos Aires (Socolow, 1987, 77). Marido de Cayetana Josefa de San Román de Illescas, y compadre de Martín José de Altolaguirre y Martín de Sarratea (FB, III, 151).

<sup>2999</sup> Marilúz Urquijo, 1988, 31.

<sup>3000</sup> Barba, 1978, 212.

<sup>3001</sup> Barba, 1978, 222. La indignación causada por la Compañía de Jesús fué provocada entre otros motivos por la expulsión que sufriera de sus filas el cura Bernardo Ibáñez de Echavarri (Furlong, 1933).

<sup>3002</sup> Lamentablemente no he hallado biografía alguna de este interesante personaje.

<sup>3003</sup> Dicho conflicto versó acerca del fuero militar de los Milicianos Paraguayos que ejercían el comercio con las provincias de abajo.

<sup>3004</sup> Pedro Melo de Portugal al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 12-IX-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

<sup>3005</sup> Lynch, 1967, 197; y Socolow, 1978, 123. Dichos capitulares fueron Judas José de Salas, Bernardo Sancho Larrea, Manuel Martínez de Ochagavía, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola y Juan Antonio de Lezica (Barba, 1978, 303). Es interesante observar que en oportunidad de ser designado el nuevo Virrey del Río de la Plata circulaban en Buenos Aires toda clase de rumores. En carta a Dámaso Padrón, residente en Córdoba, Francisco Gutiérrez de Cevallos le comentaba que "...lo se dijo que el Sr. Vértiz, después que el Sr. Cermeño, se olvidó este y se trató del primero, y ultimamente se ha dicho de ayer acá que el Sr. Rudecindo Tilli, Comandante de Artillería, le ha de suceder: Yo no se de donde salen estas noticias por que S.E. a nadie lo comunica aunque me temo que el Sr. Vértiz sea el que quede (que Dios no lo permita) por que la Casa de Ustáriz ha hecho grandes esfuerzos para este logro en la Corte aunque el ha manifestado mucha oposición" (Francisco Gutiérrez de Cevallos a Dámaso Padrón, Córdoba, 16-II-1778 [AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.65]).

<sup>3006</sup> Hijo del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas José Perfecto de Salas y de María Josefa Corvalán; cuñado del chileno José Antonio de Rojas; y primo hermano de los Corvalán de Castilla, una de las "tres casas reinantes" de Cuyo (Amunátegui Solar, 1925, 185-272; y Comadrán Ruiz, 1962, 42).

<sup>3007</sup> Bautizado en La Rioja, Castilla la Vieja, hijo de Juan Sancho Larrea y de Josefa de Aranzuy y Repes; marido de María Isabel Cevallos, hija de Ignacio Bustillo de Cevallos y de Ana Domínguez Rabanal; con cuñado de Eugenio Lerdo de Tejada; y padre de María Josefa de Vélez Sancho Larrea y Zevallos,

---

fallecida sin sucesión (Fernández de Burzaco, I, 326; IV, 138; y VI, 61; Nicoletti, 1987, 115; y JR, 1989, ítem 5308)

<sup>3008</sup> natural de la Villa de Nalda, La Rioja, España, marido de María Bernarda Sequeira, natural de Río de Janeiro; conuñado de Manuel Dutra; compadre de Francisco Tagle Bracho y Nicolás de Acha; y suegro de José Ramón Baudrix y del Corregidor de Yamparaes Andrés Tinajero de la Escalera (FB, IV, 288; y JR, 1989, ítem 4129).

<sup>3009</sup> Era nacido en Burgos, marido de Juana Inés de Fresneda y Esquivel; compadre de Domingo Cueli, José de Arroyo, Jerónimo Matorras, Gaspar de Bustamante, Francisco Cabrera, Juan Bautista González y Fr. Roque de los Remedios; y suegro de Benito Gómez de la Fuente, José María Arrascaeta y Diego Antonio de Pró (FB, IV, 234).

<sup>3010</sup> Regidor Perpetuo y Alguacil Mayor de Buenos Aires; nacido en Cádiz, hijo de Pedro de Mansilla y de María Elvira Ruiz; marido de Margarita García Posse, hija de Pedro García Posse y María Josefa Cabezas; compadre de Manuel Gutiérrez, Juan Bautista Altolaquirre, Manuel Posadas Bustamante y Pedro Vázquez; y suegro de José María Cárdenas y José de Solivárez. Falleció en 1796, sucediéndolo en el cargo su hijo Manuel Mansilla (FB, IV, 232; y JR, 1989, ítem 4457).

<sup>3011</sup> Natural de la Villa de Laredo, hijo de Manuel de Tocornal y de Antonia del Hoyo Burgos; marido de Josefa de Villa; padre del Regidor Perpetuo Fermín de Tocornal; y compadre de Benito Gómez de la Fuente (Cutolo, VII, 340; y FB, VI, 179).

<sup>3012</sup> Director de la Casa de Expósitos. Era nacido en Toledo, marido de Melchora o Micaela de Salinas, hija de Juan de Salinas Valdés y de Sabina del Barranco y Crespo Flores; y suegro de Buenaventura Marcó del Pont y de María del Rosario de Alzaga y Cabrera (FB, II, 242; y IV, 237).

<sup>3013</sup> Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, hijo natural de Manuel de Escalada y de Luisa de Sarria; marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos, hija de Juan Antonio Bustillo y de Isabel Nicolasa Ryan; compadre de José Zevallos; y suegro de Paulino Campbell, José Lino de Castro Lahore, nacido en San Juan, y de Antonio José de los Reyes Marín (FB, II, 45, 116 y 286; y JR, 1989, ítem 4644)

<sup>3014</sup> natural de Granada; hijo de Sebastián Sánchez y de María Jiménez Amador; marido de Magdalena Trillo Cárdenas, hija de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas Rendón, viuda de Manuel del Arco; suegro de Martín Thompson y Juan Washington de Mendeville; y compadre de Joaquín del Castillo y Bustamante (Gammalsson, 1980, 401; FB, VI, 60; y JR, 1989, ítem 4554).

<sup>3015</sup> natural de la Villa de Arrio, Guipúzcoa; hijo de Pedro de Zapiola y de Josefa de Oyamburú; marido de María Encarnación de Lezica y Alquiza, hija de Juan de Lezica y Torrezuri y de Elena de Alquiza; suegro de Antonio Isla, natural de León, Obispado de Astorga, y de Manuel de Luzuriaga y Mexía, natural de Lima (FB, I, 235; II, 242; IV, 144, 200, 232, 234, 288; y VI, 310; y JR, 1989, ítems 5519, 6228 y 6506).

<sup>3016</sup> Nacido en la Anteiglesia de Cortezubi, hijo de Ignacio de Lezica y de Ignacia de Ozamiz; marido de María Ramona Victoria de la Torre de Trassierra, hija de Bernardo de la Torre de Trassierra y de Petrona de Tagle Bracho; padre de Ambrosio Lezica, quien financiara la expedición militar al Alto Perú; compadre de Juan de Lezica; y suegro de Martín Ochoteco, Juan Llano, y Juan Antonio Santa Coloma (FB, IV, 143; y Navarro Floria y Nicoletti, 1990, 212; y JR, 1989, ítem 4597).

<sup>3017</sup> Heckscher, 1943, 524.

<sup>3018</sup> natural de Cádiz, contrajo primeras nupcias con Gabriela Zamudio y segundas nupcias con Sabina de Sorarte, hija de Diego Sorarte y de Juana Báez de Alpoim (FB, VI, 295).

<sup>3019</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-3, Exp. 20, fs. 67-70v, 120 y 120v.

<sup>3020</sup> Casó con María Antonia Díaz Pimienta, y fué suegro de Pablo Sisur, de Miguel de Luca, de Francisco de Paula Saubidet y de Lorenzo Cavenago (FB, V, 142; y JR, 1987, ítem 3019).

---

<sup>3021</sup> Hija del soldado José Díaz Pimienta y de Juana Morales, cuñada de Lorenzo Infante, Lorenzo Patrón y Francisco Ratto (FB, II, 239; y JR, 1987, ítem 3421).

<sup>3022</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-6, Exp. 37; Leg. C-7, Exp. 3; Leg. 270, Exp. 7.

<sup>3023</sup> Casó con María Rosa de Galain y Sorarte, hija de Martín de Galayn y de Francisca de Sorarte y Báez de Alpoin (FB, IV, 201).

<sup>3024</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 13.

<sup>3025</sup> marido de Catalina Abascal, hija de José Abascal, aguatero, y de María, mulata libre; y padre de Francisco Mariño de Barrios, marido de María Gabina Palliz, natural de Areco (VM, 1988, ítem 1934; y FB, I, 16).

<sup>3026</sup> probablemente Catalán.

<sup>3027</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 13, Exp. 21, fs. 68v.

<sup>3028</sup> Idem.

<sup>3029</sup> Ibídem.

<sup>3030</sup> Idem.

<sup>3031</sup> Soltero, miembro de la Hermandad de la Santa Caridad.

<sup>3032</sup> Hidalgo de Oñate, Guipúzcoa, Hermano Terciario de la Orden Dominica, hijo de Juan de Sarratea y de Antonia de Idígoras; marido de Tomasa Josefa Altolaguirre, hija de Martín de Altolaguirre y María de Pando y Patiño; cuñado del Factor de Cajas Reales Martín José de Altolaguirre; y suegro del Virrey Santiago de Liniers y del Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros (Cutolo, VI, 733; y JR, 1989, ítem 4924)

<sup>3033</sup> Socolow, 1978, 124.

<sup>3034</sup> Al mismo tiempo se erigieron Consulados en otros puertos de América, ver Kinsbruner, 1972; Lampros, 1980; Meltzer, 1978; Villaseñor Bordes (1970); y Woodward (1966).

<sup>3035</sup> Situadista entre 1780 y 1794.

<sup>3036</sup> Natural de Chiclana, Arzobispado de Cádiz, hijo de Francisco Dubal y de Juana Bache; y marido de Josefa Pérez Vásquez de la Barrera, hija de Diego Pérez y de Josefa Vásquez de la Barrera (FB, II, 258; y JR, 1989, ítem 4818).

<sup>3037</sup> Nacido en Bilbao, hijo de Domingo de Acha y de Lucía Avendaño; marido de Lucía Martínez de Tirado y Contreras, viuda de José Gallen, nacida en San Juan, hija de Juan Martínez de Tirado y de María Fernández de Castro; con cuñado de Pedro Carvajal, de Saturnino Saraza, y de Alonso Rodríguez y Ortiz Barrientos; padre natural y legítimo de Nicolás Antonio de Acha, y compadre de Saturnino Saraza (FB, I, 32; II, 65; IV, 291; y V, 385; y JR, 1989, ítem 6113).

<sup>3038</sup> hijo de Agustín Casimiro de Aguirre y de María Josefa de Alonso y Lajarrota; cuñado de Antonio de las Cajigas y de José Laguna Moscoso; marido de Victoria Ituarte; y suegro de Mercedes Anchorena (FB, I, 49).

<sup>3039</sup> Ingenieros, 1951, 486, nota 1; Socolow, 1978, 126; y Malamud, 1985, 23.

<sup>3040</sup> Nacido en Cádiz, hijo de Domingo De María, nacido en Nápoles y de Rosa Camuso, nacida en Lombardía; marido de María Eugenia de Escalada, hija de Antonio José de Escalada y de Petrona de Salcedo;

---

y suegro de José Antonio De María, natural de Puerto Real (FB, II, 214; y JR, 1989, ítem 7765).

<sup>3041</sup> Nacido en Vigo, hijo de Buenaventura Marcó del Pont y Borey y de Juana Angel y Méndez; marido de Francisca Javiera Díaz de Vivar, hija de Pedro Díaz de Vivar y de Melchora Salinas Valdéz y del Barranco; con cuñado de María Rosario de Alzaga y Cabrera; y suegro de Manuel Muñoz, natural de Bibiesca (FB, IV, 237; y JR, 1989, ítem 7287).

<sup>3042</sup> Ingenieros, 1951, I, 486.

<sup>3043</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8.

<sup>3044</sup> banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San Carlos.

<sup>3045</sup> Saguier, 1989b, 298-308.

<sup>3046</sup> La demora en la partida de los Situados obedecía al afán que tenían sus detentadores en especular con los dineros del propio Situado, adelantándolo en operaciones de avío a la minería. Las utilidades en el avío de la minería se realizaban por lo general en el rescate de piñas y barras. El rescate de un marco de plata en piña se lograba en Potosí a 7 pesos y 2 3/4 reales, mientras que en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y en los de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el marco (En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí se abonaba a 146 pesos [Cañete, 1952, 127]). No subiendo de 10 reales el costo de convertir cada marco de plata en moneda, le quedaba al que habilitaba a los mineros con moneda sencilla, en cada marco de las platas de Carangas, la ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro, de 4 a 5 reales. Las utilidades se realizaban también en el rescate de barras, las cuales eran practicadas preferentemente en Oruro y Chucuito y no en Potosí. Esta preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras se fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito (Saguier, 1989b, 305, nota 66).

<sup>3047</sup> Dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just. Casado en España, fué instado en 1768 por Real Cédula a restituirse a España (AGN, Reales Cédulas, t.42, f.236). Dos años después, en 1770, San Just logró que se suspendiera su remisión a España hasta que terminase la causa que se le siguió sobre introducción ilícita en Potosí (AGN, Reales Cédulas, Libro 43, f.150). Padre o hermano del Cura de la Provincia de Lipes Santiago Prego de Montaos, procesado por excesos en 1782 (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.24, Exp.582).

<sup>3048</sup> Lagunero de la Villa de Potosí en 1736 (AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, f.200).

<sup>3049</sup> Hijo de Juan de Lezica y María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de Ana Ortega y Carbajal, nacida en Potosí; suegro de José de Endeyza y Alvear y del Dr. Francisco Javier de Riglos, el primero ajusticiado por los indígenas en la rebelión de Túpac Catari; y hermano de Juan de Lezica y Torrezuri, el benefactor de la Villa de Luján (FB, 1986-90, IV, 144).

<sup>3050</sup> Juan Francisco Uzal a Nicolás de la Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>3051</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.Z-3, Exp.7; y Buechler, 1989, 406, nota 20.

<sup>3052</sup> Tjarks, 1959, 49.

<sup>3053</sup> Ver Saguier, 1989, 314-315.

<sup>3054</sup> Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco, habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187).

<sup>3055</sup> Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac

---

Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano ajena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

<sup>3056</sup> Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de Salta. Nacido en octubre de 1762, y casado en 1789 con María Josefa Posadas, hija del Maestre de Campo Felipe Posadas, Alcalde de primer voto de Salta en 1770, y de Josefa Gertrudes de Echalar y Morales, la cual había sido viuda de Domingo de Isasmendi (AC, 1937, 580). Fueron padres de Manuela Ugarteche, mujer del Sargento Mayor realista Juan Cobo (AC, 1937, 580). En 1808 pide permiso para pasar a Buenos Aires (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 16, f.178-179). En 1808 litiga por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.22, Exp.720).

<sup>3057</sup> Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250).

<sup>3058</sup> según Fernández de Burzaco era nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, y según Jáuregui Rueda en la Anteiglesia de Arrázolo, Obispado de Calahorra; hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278; y JR, 1989, ítem 6379).

<sup>3059</sup> En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

<sup>3060</sup> Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

<sup>3061</sup> Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de Iriarte y su segunda esposa Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo, y con cuñado del Dr. José de Medeyros, de Juan Manuel de Pucheta y del Coronel realista Ventura José Marquiegui (CC, VI, 24); y probablemente hermano o tío de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (LC, I, 28).

<sup>3062</sup> socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

<sup>3063</sup> natural de la Villa de Nieva de Cameros, Obispado de Calahorra, Navarra; hijo de Francisco Sáenz y de María Valiente; marido de Juana María de Pueyrredón, hija de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan; y suegro de Antonio Francisco Leloir (FB, VI, 18; y JR, 1989, ítem 4905). Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de su suegro Juan Martín de Pueyrredón. Ocurrido el asesinato de Pedro de Lagrava (representante de Pueyrredón) en Oruro durante la rebelión indígena de Tupac Amaru, y destruidas la totalidad de las mercaderías almacenadas en esa y otras plazas por el pillaje de los indios, Pueyrredón (padre) comisionó a Sáenz Valiente para restablecer las sucursales arrasadas, por lo que fué ascendido a representante y habilitado con ingentes remesas de mercancías. Finalmente, Sáenz Valiente se casó con la hija de Pueyrredón (Ver Cutolo).

<sup>3064</sup> Nacido en Pamplona, hijo de Domingo de Anchorena y de Juana Fernanda de Zunduetta; marido de Romana Josefa López de Anaya, hija de Manuel López de Anaya y de Juana Josefa Ruiz Gamiz; compadre de Cristóbal de Aguirre; y suegro de Bonifacia de Lezica y Vera Pintado, Andrea Ibáñez y Marín, y María Victoria García de Zúñiga (FB, I, 114; y JR, 1989, ítem 4586).

<sup>3065</sup> Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.

<sup>3066</sup> Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

---

<sup>3067</sup> Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopena y de María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y conuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104; y JR, 1989, ítem 4833).

<sup>3068</sup> Hijo de Bernardo de Barragán y de Eugenia Muñoz de Cuéllar, y marido de Juana Guillisástegui, hija de José de Guillisástegui y de Ildefonso Bohórquez (Morales, s/f). En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

<sup>3069</sup> Dueño del Ingenio Canteros, fué el único miembro del Gremio de Azogueros que se opuso a la implementación del Código Carolino. Era marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

<sup>3070</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

<sup>3071</sup> Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecochea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (FB, 1986, I, 33).

<sup>3072</sup> natural de Sondica, Obispado de Calahorra, Vizcaya; hijo de Andrés de Ugarteche y de Juana de Echevarría; y marido de Marcelina Josefa Pinto, hija de Joaquín Pinto de los Ríos y de Rita Antonia Lobo (FB, VI, 211; y JR, 1989, ítem 5733).

<sup>3073</sup> Mantuvo un arduo litigio con Indalecio González de Socasa y Joaquín Castro contra las contribuciones para las fiestas de toros y de Corpus Christi que exigía el Cabildo de Potosí (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8). Hijo de Antonio Obligado y Fausta Fernandez. Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, casó en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta; y en segundas nupcias con Juana Tejedor Garayo, hija del Teniente General Blas Miguel Tejedor y de Manuela Garayo; y suegro de Juan Bautista Arana (FB, I, 130; y V, 46; y JR, 1989, ítem 7059).

<sup>3074</sup> b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (FB, 1986, I, 127).

<sup>3075</sup> Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973).

<sup>3076</sup> Contrajo con mercaderes de Buenos Aires entre 1793 y 1796 siete operaciones de fiado por valor de \$25.477 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.254v.; Reg.1, año 1795, fs.560v.; Reg.1, año 1796, fs.353; Reg.3, año 1796, fs.372; y Reg.6, año 1796, fs.337 y 329)

<sup>3077</sup> Padre de Alejandra Amatller, quien contrajo una operación de crédito en Buenos Aires en 1809 por valor de \$7105 (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1809, fs.32).

<sup>3078</sup> Ampliamente detallado en Saguier, 1989b, 313.

<sup>3079</sup> Skinner, 1969, 27, cit. en McCullagh, 1991, 310. Para una crítica del contextualismo y de Skinner, ver LaCapra, 1980; Toews, 1987, 883-886; y White, 1992, 28-29.

<sup>3080</sup> Pocock, 1972, 111, cit. en McCullagh, 1991, 316.

<sup>3081</sup> Pocock, 1985, 29, cit. en Toews, 1987, 892. Aquí, según Anderson (1991), lo social y lo lingüístico

---

están radicalmente disociados y los vocabularios ideológicos llegan a ser órdenes independientes (Anderson, 1991, 180). Un año después, contrastando la obra de Isaiah Berlin con la de Pocock y Skinner, Anderson (1992) afirmaba que el primero (Pocock) creía que los argumentos específicos, la profundidad contextual y el escrutinio sistemático de un teórico eran menos importantes que su perspectiva general, y el origen de sus ideas menos relevante que sus ecos (Anderson, 1992, 231). En forma semejante a la autocrítica que Hans R. Jauss hizo respecto a los horizontes de expectativas, donde incluyó el lenguaje literario y los modos del discurso literario, más tarde Pocock (1987) extendió y refinó las nociones de lenguajes políticos y discurso político (Thompson, 1993, 263).

<sup>3082</sup> representada entre otros muchos autores por Koselleck (1985), Schmitt (1969), Reichardt y Schmitt (1985), Gumbrecht (1978), Schleich (1981) y Lüsebrink (1983). Ver Abellán (1991).

<sup>3083</sup> Reichardt y Schmitt, 1985, I, 40; citado por Popkin, 1987, 740 y 748.

<sup>3084</sup> Dworkin, 1988, 77. Sobre Heidegger y la teoría de la adjudicación, ver Leiter, 1996.

<sup>3085</sup> Idem.

<sup>3086</sup> lo que en Dworkin (1982a) es denominado teoría instrumentalista de la adjudicación (Dworkin, 1982a, 181, citado en Cady, 1986, 447), cuatro años después es denominado el principio jurídico interpretativo de la integridad adjudicativa (Dworkin, 1988, 77-78 y 125). Ver asimismo Brubaker (1985), Eisele (1988) y Warnke (1993).

<sup>3087</sup> Baker, 1981, 285, citado por Outram, 1992, 62; y Hamnett, 1997, 292.

<sup>3088</sup> En la acepción que le da Entelman (1982), la expresión discurso jurídico "...involucra tanto el proceso discursivo de la ciencia jurídica, es decir, el discurso producido por los juristas, cuanto el proceso discursivo de las normas, es decir, el discurso producido por las autoridades sociales u órganos jurídicos" (Entelman, 1982, 94). A la luz de la teoría crítica del derecho el discurso jurídico se halla conformado esencialmente por tres diferentes niveles. Lo producido por los representantes de las instituciones (notarios, ediles, jueces, asesores jurídicos) constituiría el primer nivel. Todo lo producido en la práctica teórica de los juristas (teorías, doctrinas, discusiones, etc.) y lo producido en la práctica profesional de abogados, escribanos, procuradores, y tenedores de libros constituiría el segundo nivel. Y, finalmente, el discurso que producen los usuarios, testigos, súbditos y destinatarios constituiría el tercer nivel (Entelman, 1986, 115).

<sup>3089</sup> Ver Saguier (1990b).

<sup>3090</sup> La Ley 40 de las Leyes de Toro incorporaba el derecho de representación.

<sup>3091</sup> El tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). Ver asimismo López Monroy, 1987. El derecho de retracto fue establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.50, 1423-1432; y Cattán Atala (1989). Esta institución, al decir de mi amigo y colega Ezequiel Raggio, trabó la formación de la renta capitalista, fuente material de la gestación de la burguesía. En el Virreinato del Río de la Plata se practicó sobre una chacra en Montevideo, sobre la estancia El Rodeo Grande, en Catamarca, sobre la estancia la Pampa Grande en Salta, y sobre diversas casas en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16; Leg.224, Exp.8; Leg.M-3, Exp.4; Leg.M-11, Exp.5; Leg.R-15, Exp.6 y 7; y Leg.Z-4, Exp.5 y 9).

<sup>3092</sup> Levaggi, 1992; y Saguier, 1994b.

<sup>3093</sup> Vélez (1786); Lacunza (1816); y Ramos Mexía (1819, 1820); en Urzúa (1917); Ricci, 1913 y 1929; Chagnetón (1934), Froom, 1950, IV, 922; Monti, 1966, 25-43 y 48-59; Hanisch, 1969; y Góngora, 1969 y 1980.

<sup>3094</sup> Ver Camarero, 1967; Pagés, 1983; Mariluz Urquijo, 1988b; Cussen, 1992; y permítaseme citar a José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "La fractura literaria en la formación de una conciencia política

---

independiente. El Discurso poético de protesta en las décimas y octavillas de Camboño, Ocampo Ysfrán, Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente (Virreinato del Río de la Plata, 1772-1805)", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, y celebrado el 27 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires).

<sup>3095</sup> Sánchez, 1939; Arocena, 1949; Cox, 1965; Miró Quesada, 1971; Durán Luzio, 1976; Durand, 1976; Choy, 1985; y Domínguez Faura, 1993. Sobre La Condamine y los componentes de su relato de viaje al Ecuador, ver Altuna, 1999.

<sup>3096</sup> Glick y Quinlan, 1975, 78-83; y Glick, 1991, 307-334.

<sup>3097</sup> Llama la atención como Chiaramonte (1989), quien reconoce --al estudiar la vida intelectual del Canónigo Juan Baltazar Maziel-- que el derecho era en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII "...campo crucial de las disputas sobre el regalismo" (Chiaramonte, 1989, 59), no haya investigado la serie tribunalcia de la División Colonia existente en el Archivo General de la Nación Argentina ni los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba, fuentes primarias inéditas donde habría podido compulsar los innumerables escritos de los Doctores Miguel Gregorio Zamalloa, Domingo Paz y Echeverría, Tomás Antonio Valle, Mariano Pérez de Saravia, Mariano Irigoyen, Nicolás Pombo de Otero, Fernando Pérez de Bulnes, Juan José Castelli, Juan Manuel de Labardén, Mariano Zavaleta, Miguel García de la Huerta, José Francisco de Acosta, Antonio Ezquerrene, Francisco Bruno de Rivarola, José Vicente Carrancio, Francisco de los Angeles Muñoz, Manuel Rodríguez de la Vega, Mariano Moreno, Domingo de Azcuénaga, Mariano Andrade, Ambrosio y Gregorio Funes, José Conty, José Simón García de Cossio, Matías Oviden, Agustín Pío de Elía, José Pacheco Gómez, Juan Luis de Aguirre y Tejeda, (a) "Lucho", Juan José Segovia, Facundo Prieto y Pulido, y Manuel Genaro de Villota, entre muchos otros. Cabe finalmente acotar que de los 42 documentos reeditados por Chiaramonte (1989) no hay uno solo que abone su hipótesis de la inmadurez de la élite criolla rioplatense, así como tampoco hay texto alguno que haya sido descubierto indagando la riquísima cantera documental primaria existente en los Archivos de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, o Sucre. Contra el colonialismo puede consultarse el alegato del Dr. Juan Manuel de Labardén, en Wedovoy (1955) y Marquiegui (1986). Sobre la tiranía y la libertad puede consultarse el alegato del Dr. Pedro Medrano, de 1790, en Saguier, 1989, 47. En favor de los mulatos libres que poblaban la rancharía del Convento de Santa Mónica, de los Agustinos de Mendoza, puede verse los alegatos de Domingo de Azcuénaga y Mariano Andrade, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.77, Exp.2, fs.148-149v. Como defensor de la libertad de dos franceses acusados del delito de sedición popular puede consultarse el alegato de 1795 de Tomás Antonio Valle, tío carnal materno de Mariano Moreno, en Caraffa (1914); Caillet-Bois (1938-39); Levene (1950) y Lewin (1967). Por mal trato a los Indios, ver los alegatos del Protector de Naturales del Tucumán Salvador Alberdi Egaña (padre del famoso constitucionalista argentino Juan Bautista Alberdi Aráoz), de 1799, contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, puede consultarse AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9. Contra la injusta privación de libertad, ver los alegatos del Dr. Mariano Pérez de Saravia (graduado en Santiago de Chile), ante la Real Audiencia de Buenos Aires, en defensa de los reos de Oruro, en AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1; y del comerciante Tomás Antonio Romero, acusado de contrabando, en AGN, Hacienda, Leg.71, Exp.1892; Leg.84, Exp.2174; Leg.111, Exp.2860; Leg.112, Exp.2888; y Leg.141, Exp.3620; y Tribunales, Leg.119, Exp. 28 y Leg.234, Exp.26. Contra el clericalismo, ver el alegato del Dr. Mariano Pérez de Saravia, representando al bloque del Cabildo de Córdoba liderado por el Dr. Gregorio Funes, contra los cabildantes que renunciaron al fuero capitular sometiéndose a la jurisdicción eclesiástica, en Saguier, 1991, p.18, nota 18. Contra la aplicación de las leyes del mayorazgo en las capellanías laicales, ver el alegato del Dr. Miguel García de la Huerta, de 1816, en Saguier, 1995, 386; contra el clericalismo de Córdoba y Buenos Aires, para que las capellanías no sirviesen a los curas ya consagrados y para solemnizar oratorios y días de precepto, sino para satisfacer el deseo de los hijos y deudos de alcanzar las ordenes sagradas, ver el alegato del Lic. Fernando Pérez de Bulnes, de fines del siglo XVIII, en Saguier, 1993, 89; y en Saguier (1995), próximamente en Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja"), n.30. Contra el corporativismo o la acumulación de las dos jurisdicciones ordinarias en una, puede verse en el alegato de Juan José Castelli de 1796 contra el Cabildo de Santiago del Estero (AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41); del Dr. Mariano Moreno, firmado en 1810, contra la extralimitación ejecutiva del poder jurisdiccional de los Alcaldes, puede verse en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, Exp.19, fs.33v.; de Juan Bautista de Isasi, en 1796, contra el fuero exclusivo de los Milicianos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32, citado en Saguier, 1992b, 75; del Deán Gregorio Funes, en representación del Obispo de Tucumán

Angel Mariano Moscoso y Peralta, contra el ceremonial de Visitas con capa magna impuesto por el Gobernador de Córdoba Rafael de Sobremonte (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7, citado en Saguier: "La Constelación de rangos y privilegios en la sociedad colonial. La distribución del ceremonial cívico y religioso" [inédito]); y el alegato del Dr. José Francisco de Acosta, partidario de impedir la admisión a las Cámaras de Representantes de aquellas personas que gozaren de fueros particulares, en Saguier, 1994, 56. Sobre los Recursos de Fuerza, puede consultarse el alegato de 1794 del Dr. José Vicente Carrancio, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.2, fs.6-14v.; y Leg.99, Exp.8. Contra el nepotismo vigente en los Cabildos, ver los alegatos del Dr. Fernando de Arce y Bustillos en 1776, de Nicolás García Guilleto en 1778, y de Carlos Estela en 1782, acerca del Cabildo de Córdoba, y defendido por el Lic. José Prudencio Xijena, pueden verse en Saguier, 1991, op. cit., p.18, nota 18. Contra el nepotismo del Teniente Asesor de Salta José de Medeyros, ver los alegatos del Dr. Pedro Arias Velásquez; contra el nepotismo de las elecciones capitulares de Catamarca, acontecidas en 1810, el del Dr. Antonio Ezquerrenea; y contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo Sanjuanino, ver los escritos de los Doctores Juan José Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerrenea, defendidos también por el Dr. Alexo Castex, citados en Saguier, 1990, 176-178. En favor de la libertad del esclavo Domingo, residente en Montevideo, puede consultarse el alegato del Dr. Mariano Zavaleta, en AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.11, Exp.16, fs.40 y 49v. Contra el patrimonialismo de los cabildantes propietarios de Mendoza puede consultarse el alegato del Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses, en AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24. Contra el estamentalismo, ver los alegatos de Sebastián Alegre, vecino de Corrientes, en defensa de su hija la plebeya Francisca Antonia Alegre, humillada en el disenso judicial iniciado en 1791 por el Regidor Francisco Xavier de Casajús, contra el matrimonio de su primo y cuñado Manuel Antonio Casajús (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1); del vecino de Mendoza, Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, contra su padre Fermín Martínez de Virgala, por oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp. 8, fs.16v.); del vecino de La Rioja, José Antonio Mercado, contra Nicolás Villafañe y Sánchez, por impugnar por plebeyos en un litigio ocurrido en 1795 a los testigos presentados (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247v.); y del vecino de Corrientes, Diego Benítez y Robles, contra el Alcalde Antonio Hidalgo Casajús por acusar a dos europeos candidatos a alcaldes, de plebeyos (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.36v.). Contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre, que defendía el Dr. Alexo Castex, pueden verse los alegatos de Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y Mariano Moreno (los tres graduados en Charcas), en Saguier, 1990, op. cit., p.176-178. Contra el latifundismo de los terratenientes Entrerrianos puede verse el alegato del Dr. Mariano Irigoyen, de fines del siglo XVIII, en el trabajo de este autor titulado "La Crisis Militar. Las Comandancias de Armas versus los Gobernadores y Corregidores en el siglo XVIII" (Inédito). Sobre que las cárceles no deben ser para castigo de los presos puede consultarse los alegatos del Dr. José Simón García de Cossio, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.191, Exp.6, fs.79-87; y Leg.39, Exp.2, fs.133-143. Finalmente, contra el castigo de niños puede consultarse los alegatos del Dr. Antonio Ezquerrenea (graduado en Charcas en 1792), en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.157, Exp.3, fs.75-82; y sobre el tratamiento honorífico de Don los alegatos del Dr. Ezquerrenea, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.228, Exp.16, fs.26-34.

<sup>3098</sup> Aufderheide, 1976, 151-195; Hunold Lara, 1988, 336-337; y Goodman, 1992, 13.

<sup>3099</sup> ver Mariluz Urquijo, 1958. En cuanto al cultivo de las letras, aparte de los numerosísimos romances españoles recogidos en Colombia, Perú y Argentina por diversos autores, Vicuña Cifuentes (1912) nos ofrece unos 170 romances españoles encontrados en tierra chilena y Espinosa (1953) unos 250 que aún se cantan en Nuevo México (Bertini, 1988, 455; y Goic, 1988, 434-436).

<sup>3100</sup> ver Romero, 1939; Durand, 1982; y Herzog, 1992.

<sup>3101</sup> Cabrera, 1930; Torre Revello, 1940, 1956, 1957, 1958 y 1965; Furlong, 1944; Cornejo, 1945; Luque Colombres, 1945; Draghi Lucero, 1949; Góngora, 1949; Cutolo, 1955; Olmos, 1955; Molina, 1957; Comadrán Ruiz, 1961; Crespo et. al., 1975; Rípodas Ardanaz, 1974, 1975, y 1984; Aránguiz D. (1980); Bravo Lira, 1980; Avila Martel, 1985; Cruz de Amenábar, 1989; Ramos Pérez, 1989, XI-2, 467-496; y Molina, 1991, 60-76. Acerca de la biblioteca de José Tomás Sánchez, ver AGNA, Hacienda, Leg.127, Exp.3202, fs.222-222v., y 298-299v.; de la del Subdelegado de Paria, Juan de Grandidier, ver AGNA, Hacienda, Leg.68, Exp.1812; y de la de Vicente Capello, ver AGNA, Tribunales, Leg.136, Exp.4, fs.59v., y 64.

<sup>3102</sup> Sobre el mito guaraní de la Tierra Sin Mal, ver Meliá, 1989; y Suess, 2002. Sobre el rol

---

de las cosmogonías y el ciclo cosmogónico en la historia de la humanidad a la luz del psicoanálisis, ver Campbell, 1959, 2ª. Parte, capítulo I.

<sup>3103</sup> Sobre la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Alto Perú), ver Rodríguez González, 1994. Sobre la enseñanza del derecho en la Universidad de Córdoba, 1614-1807, ver Peña, 1986. Sobre Juan Baltasar Maziél y el Colegio de San Carlos, ver Probst, 1946; y Mariluz Urquijo, 1988a.

<sup>3104</sup> Sobre el método del patio y la crisis del siglo XVI, ver Probert, 1997. Sobre el reemplazo del beneficio de patio en la minería peruana, 1850-1913, ver Contreras, 1998. Para las transferencias tecnológicas en la industria minera, ver Cañete y Domínguez, 1952. Sobre el papel del científico ante la Independencia americana, ver Peset, 1987. Para las relaciones entre la ciencia y el imperio en el contexto de una monarquía universal, ver Pimentel, 20000.

<sup>3105</sup> Sobre la distinción del Trivium y el Quadrivium en las universidades de la modernidad absolutista, ver Bernstein, 1997, 155-156; y Vélez de la Calle, et. al., 2002, 95-96. Sobre la pedagogía y mnemotecnica jesuítica, ver de la Flor, 1988.

<sup>3106</sup> ver Anderson, 1979, 64.

<sup>3107</sup> ver Anderson, 1979, 62. Sobre las polémicas acerca del pensamiento científico moderno en Santa Fe, Quito y Caracas: 1736-1803, ver Arboleda y Soto Arango, 1996; y en Charcas (Alto Perú), ver Cañete y Domínguez, 1952. Sobre el combate contra la 'Limpieza de Sangre' y el uso del estigma de la bastardía y el origen étnico como mecanismos de defensa esgrimidos por las elites coloniales Rioplatenses, ver Saguier, 1990. Sobre el reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica en el Río de la Plata colonial, ver Saguier, 1994. Sobre la Inquisición en España y América, ver Perry y Cruz, 1991.

<sup>3108</sup> ver Saguier, 1990. Sobre el impacto de las tradiciones académicas europeas en el derecho Peruano del siglo XVI, ver MacCormack, 1997. Sobre los sistemas jurídicos en la enseñanza del derecho en la Universidad de Córdoba, 1614-1807, ver Peña, 1986.

<sup>3109</sup> Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989, 357). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta, dueña del Ingenio Chaca, en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y con cuñado del Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de Alvarado y Toledo (Morales Guinazú, 1936, 104).

<sup>3110</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57. Sobre despotismo ilustrado y reforma educativa: en el Real Convictorio de San Carlos de Lima, entre 1770 y 1817, ver Espinoza Ruiz, 1996.

<sup>3111</sup> Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziél y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

<sup>3112</sup> este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 227; y Francovich, 1948, 61-71.

<sup>3113</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en los expedientes 2, 4, 6, y 10 siguen los entretelones de este conflicto; Ripodas Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185.

<sup>3114</sup> Bruno, VII, 179.

<sup>3115</sup> Sobre Domingo Muriel, S.J. y el pensamiento moderno ilustrado en el Río de la Plata del siglo XVIII, ver Furlong Cardiff, 1955. Sobre tradiciones científicas y expediciones ilustradas en la América Hispánica del siglo XVIII, ver Lafuente y López-Ocon, 1996. Sobre las consecuencias culturales

---

de la expulsión de los Jesuitas del Río de la Plata, ver Duviols, 1980. Sobre la Universidad de Charcas y la idea revolucionaria, ver Mendoza, 1941. Sobre el Barroco en el derecho, ver Bravo Lira, 1980. Acerca de la evolución del barroco literario en la época de Peralta y Barnuevo en Lima, ver Contreras y Lopez de Ayala, 1964. Sobre el discurso de la lealtad en Peralta y Barnuevo, ver J. M. Williams, 1996. Sobre literatura barroca y ámbito colonial, ver Carilla, 1969.

<sup>3116</sup> Sobre la cultura letrada o libresca, ver Chartier, 1989. Sobre las sociedades secretas y las logias masónicas en los orígenes de la nación Argentina, ver González Bernaldo de Quirós, 1999.

<sup>3117</sup> Sobre la modernidad renacentista como cuarta modernidad, ver Sotelo, 1996, 32. La tesis de Sotelo, de acuerdo a la lectura del Prof. Joaquín Meabe, vendría a ser puesta en tela de juicio por la obra póstuma de George Jellinek, titulada Fragmentos de estado.

<sup>3118</sup> Para Wilhelm Dilthey se trataba de un proceso de mundanización (Marraño, 1998, 64).

<sup>3119</sup> Sobre Bossuet y Voltaire, ver Voegelin, 1975, 3-34; y Meek, 1981, 23-26. Sobre los abogados, las instituciones judiciales y la construcción del estado argentino, ver Cutolo, 1961; y Zimmermann, 1996. Sobre Roma y su derecho en el Río de la Plata durante la Década Liberal (1820-1829), ver Mariluz Urquijo, 1991. Sobre Jeremy Bentham y la presencia del utilitarismo en Buenos Aires, 1821-1824, ver Gallo, 2002. Sobre la Nueva Mitología, y el nuevo Evangelio a partir de Gotthold Lessing pero tomado en 1754 de un manuscrito inédito de Herman Reimarus, ver Frank, 1994, 191-192. Sobre el orden y la memoria en una librería porteña de 1829, específicamente el catálogo de la librería Duportail hermanos, ver Parada, 2002.

<sup>3120</sup> Furlong, 1952, 179.

<sup>3121</sup> El poder y el conocimiento estuvieron siempre íntimamente confundidos, pues cada uno de ambos presupone al otro; no hay conocimiento sin poder, ni poder sin conocimiento. De aquí que, donde el conocimiento es afectado, las relaciones de poder no solo dicen "no", sino que estimulan, excitan, incitan al conocimiento (Poster, 1987, 113-120).

<sup>3122</sup> Tigar y Levy, 1978, 215-236; Foucault, 1986, 14; y Poster, 1987, 119.

<sup>3123</sup> Jones, 1996, 23; y Zagarri, 1988.

<sup>3124</sup> Habermas, 1987, II, 505.

<sup>3125</sup> Goodman, 1992, 4-7.

<sup>3126</sup> de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también de ahora en más identificado con las siglas CHF.

<sup>3127</sup> entre ellos los trabajos de Carlos Calvo, Atilio Cornejo, Morales Guinázú, Lascano Colodrero, Allende Navarro, Crespo Naón, Jáuregui Rueda, Vázquez Mansilla y Avellá-Cháfer, identificados de ahora en más con las siglas CC, AC, MG, LC, AN, CN, JR, A-Ch, respectivamente.

<sup>3128</sup> Para la vinculación del derecho colonial con el derecho medieval español y a través de este último con el derecho romano, ver Obregón, 2006. Para el pensamiento independiente de Francisco Hermógenes Ramos Mexía : 1773-1828, ver Priora, 2002.

<sup>3129</sup> Saguier, 1982, 317-318.

---

<sup>3130</sup> Levaggi, 1976, 257.

<sup>3131</sup> Escriche, 1838.

<sup>3132</sup> ver Saguier, 1982.

<sup>3133</sup> Siendo Alcalde Gregorio Arrascaeta "...azotó en la plaza pública a una honrada mujer española por solo haber fingido su mujer Doña María de Allende que la había agraviado en la Iglesia, sobre lo qual siguió el marido de la infamada Autos en la Audiencia de Charcas, y para evadirse Arrascaeta de la condigna providencia que esperaba acalló con dos mil pesos las quejas de la querellante" (AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5). El Regidor José de Allende "...azotó privadamente en su casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería, lo que consta de Autos, y que para no experimentar la pena que merecía se compuso con el injuriado en 400 pesos, que le satisfizo por este agravio" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5). El Regidor José Manuel Salguero "...azotó a tres individuos por imaginarios delitos, y aprovechándose de la indigencia de los ofendidos los contentó con ochenta pesos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>3134</sup> Hunold Lara, 1988, 60 y 333.

<sup>3135</sup> Hunold Lara, 1988, 336.

<sup>3136</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.

<sup>3137</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. O-4, Exp. 23.

<sup>3138</sup> Idem.

<sup>3139</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1813, fs.141v.

<sup>3140</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.61, Exp.5.

<sup>3141</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1796, fs.145v.

<sup>3142</sup> *Ibidem*.

<sup>3143</sup> Mayo, 1991, 203.

<sup>3144</sup> para compararla con este personaje colonial, ver Vicuña Mackenna, 1877, 1972. Debo esta referencia a la amabilidad del colega David Prando. También sería interesante compararla con la Bruja Blanca de Rosehall, Jamaica, ver para ello a DeLisser, 1929.

<sup>3145</sup> ver Hunold Lara, 1988, capítulo III.

<sup>3146</sup> Rafael Alcaraz, Alcalde de Barrio, demandado por el vecino Pedro Gallego, sobre atribuírsele haber dado de palos a una esclava suya y vindicado su honor (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.A-1). Antonio Morán y otro demandado por Juana Arandia sobre el castigo que dieron a una criada suya (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.M-1). Y María de la Cruz Rodríguez por malos tratamientos dados a una esclava (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.R-1).

<sup>3147</sup> hija del Cap. Juan de los Ríos Gutiérrez y de Agueda Báez de Arce, viuda de Pedro José de Sosa, y mujer de Francisco Ruiz de Quevedo (FB, V, 310)

<sup>3148</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.102, Exp.6.

<sup>3149</sup> *Ibidem*.

<sup>3150</sup> Petit Muñoz et. al., 1947, 500.

---

<sup>3151</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1783, fs.204.

<sup>3152</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1812, fs.191. Barreneche (1992) desarrolla este caso con más detalles tomados de un expediente existente en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

<sup>3153</sup> Para la transmutación de teorías jurídicas trasplantadas de Europa, ver López Medina, 2004, 22-37.

<sup>3154</sup> ficción legal desaparecida en el Código Civil que "...produce el efecto de hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese" (Escriche, 1863, 95). Para el rol de la representación como mecanismo erradicador de la violencia, ver Chartier, 1992, 59-60.

<sup>3155</sup> hijo de Ambrosio Funes y de María Ignacia de Allende, y sobrino carnal del Deán Gregorio Funes (Altamira, 1947).

<sup>3156</sup> Profesor titular de Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires, hijo de Juan José Andrés Banegas y de Justa Bartola Lobo, y cuñado del escribano Mariano García de Echaburu (FB, I, 217; y A-Ch, I, 195).

<sup>3157</sup> nació en Córdoba en 1778, hijo de José Antonio Baigorri y de Juana Rosa Puch, de inclinaciones Funesistas (debo este dato al joven colega Oscar Chamosa), y unitarias. Falleció en 1858 (Cabrera, 1930, 69; y Martínez Paz, 1983, 85).

<sup>3158</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X, fs.123 (Microfilm 5620, del CHF).

<sup>3159</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>3160</sup> no confundir con el Maestro José Domingo Baygorri, cuya relación de parentesco desconozco.

<sup>3161</sup> funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra *De Causis piis.*, editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282 y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título *De Causis Piis* está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatsbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P. Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis y al Dr. Domingo Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Este último me informa que del original no es posible sacar fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuita y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX como Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los

---

Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que perteneciera al Convento de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

<sup>3162</sup> "...qua propter quoties pauper concurrat cum divite pariter idoneo in preferendus, qua in egeno non solum concurrat gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" (Oposición del Pbro. Dr. Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF, correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).

<sup>3163</sup> hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143), quien fuera el tercer marido de María de Allende y Loza. Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

<sup>3164</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan Rodríguez (Archivo del Arzobispado de Córdoba [AAC], Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

<sup>3165</sup> hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

<sup>3166</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

<sup>3167</sup> López, 1973, 238-248; Bendix, 1974, 95; Guerra, 1990, 252; La Vopa, 1992, 79-80; Demélas-Bohy y Guerra, 1993; y Hamnett, 1997, 292-295 y 311.

<sup>3168</sup> nueva legitimidad que tiene por su origen a la mayoría de las voluntades individuales (Guerra, 1990, 251-252; y Skinner, 1987, I, 84-87). Sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, ver Acevedo, 1995.

<sup>3169</sup> Bendix, 1974, 95.

<sup>3170</sup> González Echenique, 1967, 129.

<sup>3171</sup> Foucault, 1992, 30.

<sup>3172</sup> Barnes y Becker, 1984, I, 341 y 392.

<sup>3173</sup> Carrasco, 1924, 486-487; Grenón, 1928, 33-46; Zorraquín, 1962, 158-161; Stoetzer, 1966, II, 9-40; Lewin, 1967, 23; y 1971, 59-64; Halperín Donghi, 1985, 61-76; y Filippi, 1986. Furlong (1952) dudaba que en el Río de la Plata se conociera el Contrato Social, mientras que Binayán (1934) y Gandía (1952) negaron sistemáticamente que el Iluminismo Francés influyera en modo alguno la revolución de Independencia.

<sup>3174</sup> Barnes y Becker, 1945, 1984, I, 484-492.

<sup>3175</sup> Barnes y Becker, 1945, 1984, I, pp. 646-658; y Silva, 1992, 39-50. Para una aproximación

---

lingüístico-cultural al estudio de las religiones, ver Lindbeck, 1984.

<sup>3176</sup> ver Lira Montt (1979).

<sup>3177</sup> perteneciente a los Jesuitas.

<sup>3178</sup> Doctorado en Chile; Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile y Secretario del Virrey Manuel Amat y Junient (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del Capitán Francisco Martínez de Salas y de Ana de los Ríos, viuda de Enrique Henríquez Nuño del Aguila, vecinos de Corrientes; marido de María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada; y suegro de José Antonio de Rojas y de Ramón Martínez de Rosas y Correas de Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y FB, IV, 12 y 290).

<sup>3179</sup> nació en Arequipa en 1758, hijo de Antonio José de Lastarria y de Antonia de Villamendas; estudió en la Universidad de Lima en 1774, pasando después a Chile donde estudió Leyes y Cánones, tomando el título de Bachiller en 1782 y de Licenciado y Doctor en 1783. Asesor y Secretario del Virrey Avilés; Director de las minas de Azogue de Coquimbo en 1788; contribuyó a la exploración científica emprendida por las goletas Descubierta y Atrevida (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.29, 949). Fué gran amigo de Félix de Azara.

<sup>3180</sup> Lector de Pufendorf. Hijo de Juan Martínez de Rosas y de María Prudencia Correas y Villegas; y cuñado de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos; del Alférez Real Miguel Télles Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (CC, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán Ruiz, 1962, 47).

<sup>3181</sup> ver Patterson, 1993, 261-266.

<sup>3182</sup> así eran denominados aquellos herejes del siglo II que negaban la utilidad de la oración, fundados en que Jesucristo había manifestado saber todo lo que los hombres necesitan (Migne, 1850-51, I, col.642; y Glaire, 1868, I, 573).

<sup>3183</sup> así eran denominados aquellos que asociaban las ideas de la igualdad natural con tendencias revolucionarias y temían al lujo, basados en las lecturas de Montaigne, Lipsio y Du Vair, quienes se fundaban a su vez en Séneca y Cicerón, y en la explicación dada por Salustio acerca de la pérdida de la virtud, con la caída de la república romana, durante el despotismo imperial (Skinner, 1987, I, 64; y II, 283-291; y Patterson, 1993, 270-282).

<sup>3184</sup> ver Patterson, 1993, 266-270.

<sup>3185</sup> Barnes y Becker, 1945, 1984, I, 205.

<sup>3186</sup> dejó un "Elogio a Don Luis Muñoz de Guzmán en su recepción como Vicepatrono de la Universidad" (Archivo Nacional de Chile, Archivos Varios, v.276, citado por Góngora, 1949, 222). Ver Frontaura, 1889.

<sup>3187</sup> un aparente lector del Pbro. Mateo Zambrano, pasante de Teología en el Convictorio de Santiago de Chile.

<sup>3188</sup> Dicho conflicto versó acerca del fuero militar de los Milicianos Paraguayos que ejercían el comercio con las provincias de abajo.

<sup>3189</sup> Seguramente impactado por la rebelión de Tupac Amaru. Lamentablemente no he hallado aún biografía alguna de este intrigante personaje.

<sup>3190</sup> Pedro Melo de Portugal al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 12-IX-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

<sup>3191</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

---

<sup>3192</sup> antiguo Asesor Letrado del Gobernador Andrés Mestre (Acevedo, 1965, 77).

<sup>3193</sup> Ellos fueron Juan Adrián, el Dr. Pedro Vicente, y Antonio Fernández Cornejo y Rendón. Juan Adrián era dueño de Campo Santo, introductor de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, padre de Gaspar; Juan José, casado con Gertrudis Medeyros; José Antonino y Francisco María Fernández Cornejo; y suegro de Lorenzo de Goyechea (AC, 1972, 20). El Dr. Pedro Vicente fué miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14). Antonio también fué Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

<sup>3194</sup> Español americano, hijo de José Domingo Saravia y Aguirre, uno de los que se sublevaron en 1767, y de Martina Jáuregui, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cujos establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados -entre los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan Mendilaharsu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. Fué socio de Agustín de Erquicia en el negocio de mulas con el Alto Perú, a quien defendió en un caso suscitado en 1787 con Juan Sabugo y Compañía, por el cual era conminado por el Virrey de Lima a comparecer ante los tribunales de la Real Audiencia de Lima, para rendir cuentas de un negocio de seis mulas (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.E-5, Exp.21). En 1789 se abre una causa por habérsele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

<sup>3195</sup> Halperín Donghi, 1961; y Triano, 1984, 125-154.

<sup>3196</sup> Lewin, 1967, 23; y Gato Castaño, 1992.

<sup>3197</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, citado por Acevedo, 1965, 191.

<sup>3198</sup> *Ibidem*.

<sup>3199</sup> *Ibidem*.

<sup>3200</sup> Acevedo, 1965, 136.

<sup>3201</sup> Natural de Moquegua, nacido en 1763, hijo de Pedro José Tamayo y de Josefa Fernández Dávila, sobrino del Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila, doctorado de abogado en la Universidad de Chuquisaca en 1786, casó con Inés Arias Rengel, y fué padre del Gobernador de Salta Coronel Vicente Tamayo, y suegro del General Pablo Alemán (Cutolo, VII, 270).

<sup>3202</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 196, Exp.4, fs. 93.

---

<sup>3203</sup> Idem.

<sup>3204</sup> Idem.

<sup>3205</sup> Idem.

<sup>3206</sup> El Virrey Arredondo al Rey, Buenos Aires, 5-XII-1793 (AGI, Buenos Aires, Leg. 278), citado por Acevedo, 1965, 191. Acerca de Fernando Torres y Roque de la Cerda, ver JR, 1976, 87 y 131.

<sup>3207</sup> nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-101). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (AC, 1972, 65).

<sup>3208</sup> José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991).

<sup>3209</sup> no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

<sup>3210</sup> Barnes y Becker, 1984, I, 382.

<sup>3211</sup> Según Solórzano y Pereyra los Reyes de España entendían, siguiendo la máxima de Alejandro Severo, que las alcaldías no se debían vender, "porque si el juez compraba su puesto, era natural que después vendiera su justicia" (Del Valle, 1927, 22 y 36). Sobre este aspecto de la burocracia hispana ver Tomás y Valiente, 1982, 162-164.

<sup>3212</sup> González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112. El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sugetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás García Guilledo, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibidem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibidem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibidem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibidem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación,

---

celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

<sup>3213</sup> Solo aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). Entre otro de los requisitos para postularse a cargos capitulares se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres patricias, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas.

<sup>3214</sup> ver Cotta, 1988.

<sup>3215</sup> Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII en los Cabildos seculares cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383), y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955).

<sup>3216</sup> Quienes se debían expedir acerca de dicha limpieza en las correspondientes consultas fueron siempre los Alguaciles del Santo Oficio de la Inquisición.

<sup>3217</sup> Sobre la ansiedad producida por la influencia o contaminación de la producción canónica, ver Bloom, 1997.

<sup>3218</sup> ver Foucault, 1985, 357.

<sup>3219</sup> ver Didi-Huberman, 2005, 232 y 235.

<sup>3220</sup> rebeliones indígenas, persecución del contrabando y corrupción y fraude electoral en los Cabildos.

<sup>3221</sup> secuestro, arrendamiento y venta de las propiedades de los Jesuitas Expulsos, imposición de la Renta de Tabaco y Naipes, Real Ordenanza de Libre Comercio, Real Pragmática de matrimonios, Real Ordenanza de Intendentes, etc.

<sup>3222</sup> ver Cussen, 1992; y Amícola, 1997, 37-49.

<sup>3223</sup> para la delimitación de los niveles de identificación estética, ver Jauss, 1992, 243-257. Para la crítica de Jauss a la tipología diacrónica de Frye, ver Jauss, 1992, 244, nota 5.

---

<sup>3224</sup> sobre los estudios clásicos (latinos y griegos) en el Río de la Plata, ver Camarero, 1967; y Pagés, 1983; en el mundo Europeo, ver Pocock, 1975; y en el mundo Latinoamericano, ver Brading, 1983; y sobre los estudios bíblicos en el mundo, ver Frye, 1982; y Girard, 1982.

<sup>3225</sup> González Echeverría, 1990; Lázaro Carreter, 1990; y Cussen, 1992.

<sup>3226</sup> ver Halperín Donghi, 1961.

<sup>3227</sup> sustentada por Chiaramonte (1989).

<sup>3228</sup> AGNA, Hacienda, Leg.47, Exp.396; Criminales, Leg.11, Exp.12; y Bandos, Libro 4, fs.134, y Libro 5, fs.122, 180 y 182.

<sup>3229</sup> Durand, 1988, 458.

<sup>3230</sup> nombrado también Vicente Espinel Gómez y Adorno, o simplemente Vicente Espinel; músico, inventor de la quinta cuerda de la guitarra, poeta, capellán, y escritor, cuya novela Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón mereció encendidos elogios de sus contemporáneos Lope de Vega, Argensola y otras celebridades.

<sup>3231</sup> Navarro, 1956, 250, 304, 349, 403; y Baher, 1970, 299.

<sup>3232</sup> Díez-Echarri y Roca Franquesa, 1960, 1982, 692-693.

<sup>3233</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Ed. Espasa), t.46, p.724.

<sup>3234</sup> AGNA, Hacienda, Leg.47, Exp.396; Criminales, Leg.11, Exp.12; y Bandos, Libro 4, fs.134, y Libro 5, fs.122, 180 y 182. Sobre la difusión de pasquines en verso en Arequipa, Pasco, Lima, Chuquisaca, Oruro, Santiago del Estero, y Cuzco es preciso consultar a Lewin, 1957, 158-163; 183-185; 407-408; 431-433; 579-560; 633-634; 666-667; y 844-846; Vázquez Machicado, 1957, 9; Galdos R., 1962; Montenegro, 1967, 27-57; y Lohmann Villena, 1972.

<sup>3235</sup> para la influencia de la lírica clásica en el Río de la Plata, ver Camarero, 1967; y Pagés, 1983.

<sup>3236</sup> para el estudio de los cánones de comparabilidad, ver Fokkema e Ibsch, 1988, 197.

<sup>3237</sup> Rama, 1984, 33 y 43.

<sup>3238</sup> Warburg, 1966, citado en Ginzburg, 1994, 49.

<sup>3239</sup> acerca del grotesco en el héroe Rabelaisiano, ver Bajtin, 1987, 22-57; y Jauss, 1992, 315-322.

<sup>3240</sup> acerca de la identificación irónica, ver Jauss, 1992, 283-294.

<sup>3241</sup> Sewell, 1990, 527-52; y Tarrow, 1993, 87 y 88.

---

<sup>3242</sup> Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>3243</sup> Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>3244</sup> Lewin, 1957, 564-565.

<sup>3245</sup> Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120).

<sup>3246</sup> Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ejecutado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144).

<sup>3247</sup> En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

<sup>3248</sup> Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo, hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fiado con comerciantes porteños por valor de \$12.399. El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa, XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN, Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11; Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro 9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General Vicente Nieto perdió Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita, Huaqui y Sipe-Sipe. Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (Cutolo, III).

<sup>3249</sup> Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el suegro del Brigadier General Don Sebastián de Seguro (Aránzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

<sup>3250</sup> Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

<sup>3251</sup> Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de Socasa, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguera, ha caído con el tiempo en la mayor inopia, hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo, inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las

---

cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por donativo gracioso para él y sus hijos, prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X, 106).

<sup>3252</sup> Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250). En 1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fiado por valor de \$124.284 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro 1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcu, mujer del Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de Ramón de Roxas y Orueta (Aránzaes, 1915, 303).

<sup>3253</sup> Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Seguro, hija de Francisco de Seguro y de María Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804 contrajo media docena de operaciones de fiado por valor de \$55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.; Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

<sup>3254</sup> En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

<sup>3255</sup> Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

<sup>3256</sup> Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de Iriarte y su segunda esposa Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo, y con cuñado de Ventura de Marquiegui y Gostoa, natural de la Villa de Elgueta, y de Juan de Simón y Olaso, natural de Burgos (Zenarruza, 1991, 399), y de Juan Manuel de Pucheta; y probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (LC, I, 28).

<sup>3257</sup> socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

<sup>3258</sup> Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de la sanjuanina María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y con cuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

<sup>3259</sup> Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

<sup>3260</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

<sup>3261</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

<sup>3262</sup> Idem.

<sup>3263</sup> acerca de la identificación simpatética, ver Jauss, 1992, 270-276; y acerca de la identificación catártica, ver Jauss, 1992, 277-282.

<sup>3264</sup> Para la actualidad de esta temática como modo de resistencia al poder, ver Arancibia, 2005, 34.

<sup>3265</sup> Serulnikov, 2006, 250.

<sup>3266</sup> Las dos últimas composiciones en lugar de diez versos contienen nueve, alterándose también la métrica de la "espinela". En la cuarta estrofa el segundo verso rima con el tercero, y el séptimo con el octavo. En la quinta y última estrofa, el primer verso rima con el tercero y con el cuarto, el quinto con el sexto y con el

---

noveno, y el séptimo con el octavo.

<sup>3267</sup> Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.37, Exp. 951. Entre las Canciones Históricas recopiladas por Carrizo (1942) del cuaderno de notas heredado por una vecina de Angulos (Famatina) Doña Aurora viuda de Tejada, figuran una media docena de décimas cuya autoría podría ser, mediando un estudio de texto, atribuida al mismo Ysfrán (Ver canciones número 108, 111, 119, 122, 126, y 131).

<sup>3268</sup> Alcalde Provincial de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

<sup>3269</sup> Receptor de Penas de Cámara (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

<sup>3270</sup> Depositario General (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

<sup>3271</sup> AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14.

<sup>3272</sup> Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

<sup>3273</sup> Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

<sup>3274</sup> Cornejo, 1977, 68, 81 y 82; y Echazú Lezica, 1987, 351.

<sup>3275</sup> El apellido San Millán es originario de la Villa de Azcoitia, partido judicial de Azpeitia, Guipúzcoa (García Carraffa, LXXX, 167). Casó con María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel, hija del Coronel Antonio de Figueroa y Suárez de Cabrera, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiaguense, y de María de Suasnábar (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui; ver también Cornejo, 1937, 167). Era probablemente hermano o primo del comerciante avecindado en Potosí Don Dionisio Gonsález de San Millán. En 1795 es impugnado por el Cabildo de Salta para el cargo de Alcalde, del cual en 1805 es despojado (AGN, Interior, Leg.36, Exp.4; Tribunales, Leg.199, Exp.12). En 1795 pide ser Proveedor de los Fortines San Fernando y San Luis (AGN, Interior, Leg.43, Exp.6).

<sup>3276</sup> Español americano, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. Don Mateo era hijo de José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José María (casado con Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de Saturnino, (casado con Luisa Saravia). En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cuos establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados -entre los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan Mendilaharsu, y otra separada del caudillo santiaguense Juan Felipe Ibarra. En 1789 se abre una causa por habersele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

<sup>3277</sup> Doctorado en la Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre

1778 y 1780, en la misma época en que sus compatriotas los hermanos Fernández Cornejo controlaban el Cabildo de Salta (Cutolo, II, 484; y Cornejo, 1947, 151-158). Era tío carnal de Juan Estéban Tamayo, Teniente Asesor en 1796 del Gobernador Intendente Ramón García Pizarro (Cutolo, VII, 270). Según Acevedo (1965) cuando esta designación fué sospechada de nepótica por las autoridades centrales Fernández Dávila fué permutado por Medeyros, que era Asesor en La Paz (Acevedo, 1965, 144).

<sup>3278</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38.

<sup>3279</sup> Hija del Comandante de Armas y Encomendero de Salta Coronel Antonio de Figueroa, y de María de Toledo Pimentel e Hidalgo Montemayor, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver también Cornejo, 1937, 167).

<sup>3280</sup> según declaró en 1795 el Gobernador-Intendente de Salta "...Don Roque Avila no es natural de esta Provincia, si no de la de Córdoba, y aunque no tengo noticia de su familia, le supongo de noble estirpe, pero su porte es tan obscuro, que hace cerca de veinte años reside insociable en una estancia, sirviéndole de albergue un rancho" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.51v.). En su defensa, el Dr. José Miguel Carvallo arguyó que "...ya ha sucedido haberse quitado a un Hombre el Arado de las manos, para hacerlo empuñar el cetro y sentarlo en el Trono de una Nación culta y opulenta como sucedió con Wamba Rey Godo de las Españas [elegido Rey a la muerte de Recesvinto en 672, se destacó por haber sometido a los Vascos], según refieren algunos de nuestros Historiadores por que solo se atendió a su capacidad y valor para Gobernar ¿que desproporción puede haber para que Don Roque Avila se le haga dejar los instrumentos de la agricultura, y tome la vara de Alcalde para despachar quatro negocios de poca entidad en un Pueblo corto, maiormente con el auxilio de Letrado de quien debe valerse aun la persona mas entendida y adornada de capacidad como no sea jurisperito" Iidem, fs.68v.).

<sup>3281</sup> Apellido originario del partido judicial de Guernica, Vizcaya (García Carraffa, XLII, 164). Citado por Frías, 1924, II-III, 142 y 196.

<sup>3282</sup> Eran hermanas de: Fructuoso Figueroa (casado con Francisca Güemes y Goyechea); Francisco Xavier de Figueroa (casado con Magdalena Fernández Cornejo, hija del Coronel Antonio Fernández Cornejo y Rendón y de María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, padres ambos de 13 hijos); Santiago Figueroa (casado con Isabel Aráoz y Figueroa, hija de José Manuel de Aráoz y de Nicolasa Figueroa, padres del Coronel Mariano José Figueroa; Apolinario Figueroa (casado con María Mercedes Fernández Cornejo y de la Corte); Trinidad Figueroa (casada con Francisco Xavier Aráoz); y Narciso Figueroa (casado con Gabriela de Goyechea y Cornejo).(AC, 1972, 107; y 1983, 42-45).

<sup>3283</sup> Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés de Burela y Aguirre, mujer de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas generosamente por Carlos Jáuregui Rueda).

<sup>3284</sup> Hijo del Maestre de Campo Francisco de Toledo Pimentel y Burgos de Célis y de Doña Juana Crisóstoma Hidalgo de Montemayor y Arias Velásquez; marido de Inés de Burela y Aguirre; hermano de María de Toledo Pimentel, mujer de Antonio de Figueroa y Suárez de Cabrera; de Luisa Pastora de Toledo Pimentel, mujer de Juan Francisco de Alvarado; de Vicente de Toledo Pimentel, marido de Feliciano Castellanos, la cual era viuda de Agustín de Zuviría; de Feliciano de Toledo, mujer del Coronel Lorenzo Martínez de Mollinedo; y de Antonio de Toledo Pimentel, marido de María Josefa Porcel de Peralta y Aguirre; y padre de Tomasa de Toledo Pimentel, mujer de José María Todd, y de Gregoria de Toledo Pimentel, mujer de Matías Gómez Linares (Cornejo, 1982, 44-45).

<sup>3285</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.37v.

<sup>3286</sup> Al pasar por Tucumán, Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por que ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en \$4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias, se ahorrase los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba

---

debiendo haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, fs.52).

<sup>3287</sup> Coronel, nacido en España, designado Gobernador-Intendente de Salta en 1796, cargo que asumió en 1798 (Cutolo, 1967, IV, 307).

<sup>3288</sup> Nacido en Moquegua, al igual que los tres hermanos Fernández Cornejo, doctorado en la Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 (Cutolo, 1967, II, 484; y Cornejo, 1947, 151-158).

<sup>3289</sup> Nacido en Mendieta en setiembre de 1766, hijo de Francisco de Uriburu y Ajuria y de María Cruz de Basterrechea (García Carraffa, LXXXVI, 151). Contador de las Cajas de Oruro, casó con Manuela de Hoyos y Aguirre, hija del Alcalde Domingo Gonsález de Hoyos y de Francisca de Aguirre y Aguirre (Calvo, 1936, II, 348; Cornejo, 1937, 579).

<sup>3290</sup> El R.P. Felipe Antonio de Iriarte, Don José Tomás Sánchez, José Gabino Blanco, Don Antonio Aguela y Matías Gómez Linares (Arenas Luque, 1943).

<sup>3291</sup> Marilúz Urquijo, 1955, 95; y Acevedo, 1965, 425.

<sup>3292</sup> José de Medeyros era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aránzaes, 1915, 480). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte, cuyo padre era natural de Moquegua, al igual que Tadeo Fernández Dávila (Cornejo, 1972, 65).

<sup>3293</sup> AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

<sup>3294</sup> Nacido en Jujuy en 1759, protector de Mariano Moreno.

<sup>3295</sup> Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre.

<sup>3296</sup> AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

<sup>3297</sup> *Ibidem*.

<sup>3298</sup> Rafael de la Luz al Marqués de Sobremonte, Salta, 4-IX-1805 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.138, Exp. 21), citado por Acevedo, 1965, 425-426.

<sup>3299</sup> marido de Catalina Fernández de Loria, hija de Manuel Fernández de Loria, vecino de Salta, y de Sabina Arias Velásquez (Jáuregui, 1976, 114). Cornejo (1937) señala un matrimonio previo de Tejada con Juana Antonia Salvo, con la cual tuvo a Juliana Tejada, mujer del Coronel Francisco Elías Martínez de Hoz, hijo de Mateo Martínez de Hoz y de Agueda Alonso Martínez (Cornejo, 1937, 637).

<sup>3300</sup> Alcalde de Segundo Voto de Salta en 1796. Nacido en la Villa de Calaf, Barcelona. En 1796 solicita se lo exima de servir de Alcalde (AGN, Solicitudes Civiles, Libro 5, M-O).

<sup>3301</sup> propietario de la hacienda Yatasto, marido de Vicenta Figueroa y Toledo Pimentel, padre del Coronel Rudecindo Ibazeta, y suegro de José Tomás Toledo y del militar colombiano Domingo López de Matute, ejecutado por servir a las armas realistas.

<sup>3302</sup> Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés de Burela y Aguirre, mujer de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas generosamente por Carlos Jáuregui Rueda).

<sup>3303</sup> hijo del Lic. Juan Bautista Castellanos y de su tercera esposa Juana Francisca de Saravia y Aguirre; marido de Magdalena Velasco; y padre de Aaron Castellanos (Cutolo, II, 196).

---

<sup>3304</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. De este listado surge a las claras la fuerte composición mercantil de este militante grupo político. Texada, el más fuerte de todos, llevaba practicadas con Buenos Aires 26 operaciones de fiado entre 1771 y 1791 por valor de \$220.234. Rosales concertó con Buenos Aires entre 1784 y 1808 media docena de operaciones con los acreedores Juan Martín de Pueyrredón, Francisco Ignacio de Uriarte, Manuel de Arana y Torrezuri, Tomás de Valansátegui, Domingo Belgrano Pérez y Diego Agüero, por valor de \$42.818. Nadal y Guarda celebró entre 1786 y 1805 una docena de transacciones, acreditadas por Juan Antonio de Lezica, Tomás de Valansátegui y Juan José de Lezica, por la suma de \$33.568. E Ibaceta alcanzó a concertar entre 1798 y 1804 cuatro operaciones, adelantadas por Juan Antonio de Lezica y Anselmo Sáenz Valiente, por valor de \$19.825.

<sup>3305</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. Era costumbre en la Europa Medieval y Renacentista exponer en la plaza pública en oportunidad de celebrarse fastos impopulares las tripas e intestinos de los bovinos (Bajtin, 1987, 133, 146, 147 y 158).

<sup>3306</sup> Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, casado con Bárbara Martínez de Tineo (Cornejo, 1973, 40).

<sup>3307</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21.

<sup>3308</sup> Hijo Juan Adrián Fernández Cornejo, dueño de Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, y de Clara de la Corte, y hermano de Juan José Fernández Cornejo, casado este último con la única hija del Teniente Asesor José de Medeyros.

<sup>3309</sup> solicitada por el R.P. Fr. Ilario Torres O.M.

<sup>3310</sup> Nacido en Salta, propietario de la Hacienda de Ledesma, hijo de Pedro Antonio Ramírez de Ovejero y de Rosa Gonsález y Soza, casado con María Antonia de la Zerda y Urristi, hija de Luis de la Zerda y de María Trinidad Urristi, padres del que fuera Gobernador de Salta en 1867 Sixto Ovejero Zerda (Cutolo, VI, 164; Cornejo, 1937, 164; Jáuregui, 1976, 132).

<sup>3311</sup> Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre, nacido en 1772 y casado con María Josefa de la Corte, hija de Anselmo de la Corte y de María de los Santos de León y Aguirre (Cornejo, 1937, 479-492). Era hermano del Clérigo Pbro. Don Santiago Arias y Saravia, y primo hermano de Mateo de Saravia y Jáuregui. Su mujer era prima hermana de José Antonino Fernández Cornejo, de Gaspar Arias Velásquez y de la Corte, y de Magdalena Goyechea y de la Corte, madre del General Martín Miguel de Güemes (Cutolo, I, 234). Poseía una valiosísima biblioteca jurídica (Romero Sosa, 1949). Como juez fué recusado en 1806 por el Gobernador Rafael de la Luz en el caso sustanciado contra el Administrador de la Renta de Tabacos José Tomás Sánchez (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3143, Doc. No. 8). Su primo carnal y político Gaspar Arias Velásquez era también poseedor de una valiosa biblioteca (Cornejo, 1945).

<sup>3312</sup> nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Cordoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y con cuñado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta, del Coronel Ventura José Marquieguy Marquieguy y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65). En 1807 el Cabildo salteño, se quejaba de la traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado.

<sup>3313</sup> AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.24, fs.49.

<sup>3314</sup> *Ibidem*.

<sup>3315</sup> Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel

---

Fernando Bravo de Rueda [padres del asesinado José Bravo de Rueda], y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77 y 119). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). Era concuñado de Pedro de Medina y Montalvo.

<sup>3316</sup> Hijo del Maestre de Campo Agustín de Iramain y de Josefa Santillán, casado en primeras nupcias con Paula López de Velazco, sin sucesión, y en segundas nupcias con Pascuala Bailona Díaz Gallo (Figueroa, 1927, 57). Fueron padres de Juan Manuel Iramain, marido de Micaela Aranda, y de José Domingo Iramain, marido de Francisca Borges y Urrejola, hermana del Coronel Juan Francisco Borges (Di Lullo, 1948, 147).

<sup>3317</sup> marido de Casilda Araujo, y padres de Bernarda Frías, mujer de Pedro Pablo Gorostiaga (Figueroa, 1927, 33).

<sup>3318</sup> Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

<sup>3319</sup> Casado con Josefa Ignacia Gorostiaga.

<sup>3320</sup> marido de Jacinta Argañaraz y Murguía y padre de Pedro Ignacio Unzaga (Cutolo, VII, 424).

<sup>3321</sup> Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

<sup>3322</sup> Joseph Frías al Maestre de Campo Santiago de Liniers, Santiago del Estero, 12-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

<sup>3323</sup> *Ibidem*.

<sup>3324</sup> Acuerdos, III Serie, I, 206; y Carbonell de Masy, 1992, 276.

<sup>3325</sup> También se registró en Chile una resistencia contra la implantación del Estanco (Carmagnani, 1961, 168-177).

<sup>3326</sup> yerno del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

<sup>3327</sup> primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

<sup>3328</sup> AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

<sup>3329</sup> probablemente pariente del Gobernador Vértiz y Salcedo.

<sup>3330</sup> En 1755 conjuntamente con Antonio de Guzmán y Mendoza había iniciado juicio contra Nicolás Ballesteros (AGN, Tribunales, Leg.269, Exp.4). En el mismo año había demandado a Mariano Vidal (AGN, Tribunales, Leg.266, Exp.8). En 1756 inició otra demanda contra Domingo de Chávez (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.6).

<sup>3331</sup> Saldías, 1893, 259-260, citado por Montero Reguera, 1992, 134. Ver también Caballero Calderón, 1948; Miró Quesada, 1948; Apraiz, 1985; y Fernández, 1994.

<sup>3332</sup> Acevedo, 1969, 144.

<sup>3333</sup> Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5).

<sup>3334</sup> Rázori, 1945, I, 562-567.

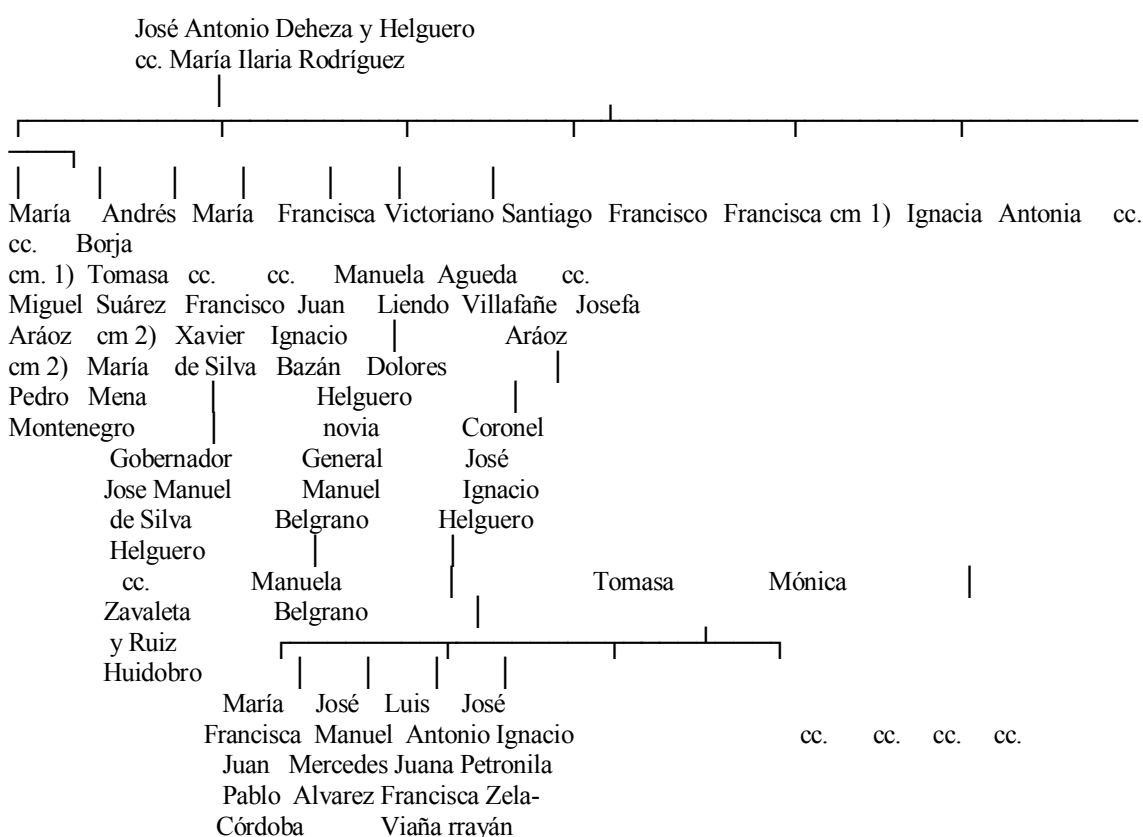
<sup>3335</sup> Acerca de la cultura y las aventuras de Pozo, ver Furlong, 1952, 470-476; y Acevedo, 1993.

<sup>3336</sup> AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9.

<sup>3337</sup> personaje aún no identificado. Existió en La Paz entre 1761 y 1770 un comerciante denominado Blas José de Sabando (Jáuregui Cordero y Pérez Velasco, 1993, 130).

<sup>3338</sup> Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras (1781), b. el 31-XII-1743 (Díaz de Molina, 1946, 44). Era hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino carnal del Cura Párroco de Tucumán Dr. Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombes, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Juan Silvestre estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Xavier de Villavieja, natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas nupcias con Catalina Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María Francisca Helguero, mujer de Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia Helguero, mujer de Francisco Xavier de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela Liendo, padres de la que fuera la amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero, casado con Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del Comandante General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel José Ignacio Helguero, amigo y primo del General Gregorio Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas, 1987, ítems 35 y 145).

#### Cuadro A



---

(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

<sup>3339</sup> natural de Tucumán, hijo de Lorenzo García de Valdés y de Juana de la Lastra, marido de Dominga de Villafañe, hija de Diego de Villafañe y de María de Corbalán y Castilla; sobrino político de Francisco Xavier Fernández Campero; y cuñado del R.P. Diego Villafañe S.J., de José de Molina y de Francisco Antonio Zorrosa; y padre de Diego Villafañe y García de Valdés (Corominas, 1987, ítem 206). Acerca de sus descendientes, ver Schleh (1955).

<sup>3340</sup> Apellido originario del Consejo de Sopuerta, partido judicial de Valmaseda, Vizcaya (García Carraffa, LVIII, 65). Marido de Elena Alurralde, hija de Miguel Alurralde y de Josefa de Villagra López. Sin sucesión, su viuda contrae segundas nupcias con José Ignacio de Garmendia (Avila, 1920, 50; y Calvo, 1936, I, 49). Ella era hermana de Pascual Alurralde, quien casó con Josefa de Ojeda Carrasco, hija de José de Ojeda. A pesar de la afirmación de Avila (1920), Calvo (1936) trae un hijo llamado Juan José de las Muñecas Alurralde, casado con Catalina Aráoz, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, cuya viuda contrae segundas nupcias con Fermín Ruiz Poyo (Calvo, 1936, I, 77).

<sup>3341</sup> Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

<sup>3342</sup> era hijo de Diego Ignacio Aráoz y del Campo y de Josefa Paz de Figueroa; marido de Francisca Núñez de Herrera; hermano del Cura Vicario de Monteros Diego Aráoz; padre del Pbro. Pedro José Miguel Aráoz; y tío de la poetisa Josefa Rosa Aráoz Valderrama, mujer de Salvador Alberdi.

<sup>3343</sup> Regidor, Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería del Tucumán y agregado al Cuerpo de Arribeños. Nació en Cabrejas del Pinar en 1748. En 1808 Manuel Pérez Padilla hizo renuncia de su oficio de Regidor en su hijo Miguel (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.52, Exp.1508, fs.49). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, los Aráoz extrajeron del Colegio Jesuítico del Tucumán, luego de la Expulsión, para la casa de Isabel García Aráoz "...todo lo que respecta a vidriería que había encajonada, y aún los vidrios que ya estaban colocados en las ventanas" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>3344</sup> Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5).

<sup>3345</sup> Acerca de la admiración como efecto estético, ver Jauss, 1992, 264-270.

<sup>3346</sup> Para Bajtin (1987), los elogios y las injurias eran dos caras de la misma moneda, pues el vocabulario de la plaza pública era en el Renacimiento "...un Jano de doble rostro" (Bajtin, 1987, 149, 375, 380 y 390).

<sup>3347</sup> Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en 1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, ítem 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José Domínguez (padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez), y del Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214). Asimismo, Texerina era suegro de Manuel Fernández Carranza, y padres de Agueda Tejerina y Domínguez, mujer de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379). Se había solidarizado con el Administrador del Estanco del Tabaco Gaspar de Salcedo.

<sup>3348</sup> para el rol de Gedeón en el Israel bíblico, ver Malamut, 1953; Emerton, 1976; Mazar, 1983; y Stager, 1985; citados en The Anchor Bible Dictionary (NY: Doubleday), 1992, v.2, 1015.

<sup>3349</sup> Alcalde de Primer Voto de Tucumán en 1804. Diputado del Consulado de Buenos Aires en Tucumán, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744, marido de Agueda Tejerina y Domínguez, hija del Alcalde Fermín Tejerina y de Teresa Domínguez (Avila, 1920, 69). Alega el perseguido abogado Barón del Pozo en uno de sus numerosos interrogantes si cohechado Pedro Gregorio López Cobo por Don Manuel Pose "...solapó la

---

muerte que ejecutó éste [Pose] en un muchacho español libre, que tuvo mucho tiempo atado con un grillete, y lo sepultó dentro de su misma casa" (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 373). Es interesante observar que el antagonismo manifestado entre Manuel Posse y Manuel Padilla pareciera haberse perpetuado clánicamente, por cuanto en la segunda mitad del siglo XIX los herederos de ambos mantuvieron crónicas disputas por el poder político provincial.

<sup>3350</sup> Sobre el mago Merlín, ver Cunqueiro, 1986.

<sup>3351</sup> Sobre Longino, ver Arias, 1980, 67-69; y Tenorio Tenorio, 2005.

<sup>3352</sup> *Ibidem*, fs.11

<sup>3353</sup> Maier, 1972, 54, citado por Tarrow, 1993, 78. Montero Reguera (1992) refiere que en Mexico, en 1621, se paseó por la ciudad una máscara en la que figuraban varios caballeros andantes, y en Lima, en 1630, la Universidad realizó un desfile de carros entre los que figuraba el de Marte (Montero Reguera, 1992, 135).

<sup>3354</sup> AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5.

<sup>3355</sup> *Ibidem*.

<sup>3356</sup> *Ibidem*.

<sup>3357</sup> *Ibidem*.

<sup>3358</sup> *Ibidem*.

<sup>3359</sup> Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988, n.1, 27.

<sup>3360</sup> Gruzinski, 1991, 247.

<sup>3361</sup> Hernández Sánchez-Barba, 1978, 110-111.

<sup>3362</sup> Grenón, 1922, 257; y Serrano Redonnet, 1979, 215.

<sup>3363</sup> Es muy probable que Ocampo haya conocido en Córdoba al R.P. José Manuel Peramás S.J., poeta latinista, cuyos poemas endecasilábicos fueron vastamente conocidos, y de quien pudo haber aprendido la técnica de la espinela (Furlong Cardiff, 1925-26; y 1946, 145-155). Peramás estuvo en Córdoba entre 1755 y 1758, para luego trasladarse a las Misiones Jesuíticas y volver a Córdoba en 1763, donde se quedó hasta su expulsión (Furlong Cardiff, 1937; y 1952, 13. También es factible que Ocampo Ysfrán haya frecuentado las únicas bibliotecas privadas que entonces existían en La Rioja y Catamarca, en manos del Pbro. Antonio Fonseca y de Francisco Gutiérrez de Villegas (Furlong, 1944, 68).

<sup>3364</sup> Romero, 1976, 79.

<sup>3365</sup> Velázquez, 1964, XXI, 18.

<sup>3366</sup> padres del expulso R.P. Joaquín Caamaño, S.J., conocido geógrafo y especialista en idiomas indígenas (Serrano Redonnet, 1979, 179).

<sup>3367</sup> Grenón, 1922, 259, citado por Bazán Lazcano, 1973, 501, nota 31.

<sup>3368</sup> Habiendo nacido en 1771, Francisco Antonio contaba al momento de morir su padre con sólo doce años. Es muy probable entonces que, por ser albacea de su padre, nuestro poeta "bastardo" haya influido en la educación de sus hijos.

<sup>3369</sup> En cuyo honor el poeta Juan Cruz Varela escribió la obra titulada "Loa a los Días del Señor Provisor y Rector del Colegio Eclesiástico de Córdoba" (Serrano Redonnet, 1979, 182).

---

<sup>3370</sup> autor en cuarenta décimas del Poema Panegírico de las gloriosas proesas (sic) del exelentísimo señor Dr. Santiago de Liniers...y demás Personas y Gremios que han contribuido a la defensa de nuestro patrio suelo en dos ataques contra la nación británica (Buenos Aires: Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1807), reproducida en Puig, 1910, I, 13-28. Probablemente conocido de Vicente López y Planes, el autor de la letra de nuestro Himno Nacional.

<sup>3371</sup> Serrano Redonnet, 1979, 180.

<sup>3372</sup> ver Andreucci Aguilera, 2000.

<sup>3373</sup> Grenón, 1922, 256; y Carrizo, 1942, III, 413-415.

<sup>3374</sup> Grenón, 1922, 259

<sup>3375</sup> permítasenos citar a Saguier, 1990, 164; trabajo donde relato el caso de estupro denunciado por el Alcalde Nicolás Peñaloza contra Francisco Vera y Bustamante. Ocampo Ysfrán era marido de Tomasina Vera, parienta de Francisco, y seguramente participó de su defensa, donde se citan textos latinos de Anicio Boecio, Salustio, Virgilio, Cicerón y Tácito.

<sup>3376</sup> Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Respecto al rol que jugaron las mujeres en dicha rebelión, la primera en ser detenida fue Catalina González y más luego "...a Morphy lo tenían ya persuadido [Manuel Rivera y otros] a que se pusiesen en prisión algunas mujeres: sobre lo que me atacaron una tarde los tres, y les hablé resueltamente, que por mi dictamen no: que bien podían aprisionarlas; pero que yo no había de hacer caso de ellas para nada; porque todo su delito, decían era haber hablado algo a favor del común" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.12 y 41v.).

<sup>3377</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Ver Bruno, 1967, V, 314.

<sup>3378</sup> Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano Rolón (marido de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel Luque), y Fernando Soberón (Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, items 18, 415, 523, 653, 694, 328, 404, 853 y 872).

<sup>3379</sup> hijo de Alonso Hidalgo Viera y Torres y de Lorenza Casajús y Fernández.

<sup>3380</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.31v.

<sup>3381</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.26, Exp.12. Felipe Díaz Colodrero casó con una hija de Juan Estéban Martínez y Francisca Hidalgo Casajús.

<sup>3382</sup> Acuerdo del Cabildo de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, 1-I-1794 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.2).

<sup>3383</sup> suegro de Felipe Díaz Colodrero y Estéban María Perichón de Vandeuil.

<sup>3384</sup> Casado en 1775 con Margarita Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio, pertenecientes a la facción ajesuitada; y padres de Josefa de Bedoya y Lagraña, mujer de su primo segundo José Simón García de Cossio y Zamudio (Calvo, IV, 33; Palma, 1957; y Bonastre, 1936).

<sup>3385</sup> Tío carnal de José Ignacio Benítez, de Juan Gonsález (por hallarse casado con una hija de Josefa Benítez, hermana de Don Serapio), y de Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de Eugenio Cabral.

<sup>3386</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

<sup>3387</sup> Tío carnal del Alcalde de segundo voto Don Francisco Baldéz, casado éste con María Antonia Gonsález, hija de Margarita Cabral, la cual era hermana de Eugenio Cabral, y pariente este inmediato del Alcalde Provincial.

---

<sup>3388</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

<sup>3389</sup> Teniente Gobernador de Corrientes.

<sup>3390</sup> *Ibíd.*, fs.7v.

<sup>3391</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg.51, Exp. 1253.

<sup>3392</sup> Levene, 1960, 123.

<sup>3393</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.234, Exp.20, fs.-8v.

<sup>3394</sup> *Ibíd.*

<sup>3395</sup> Bareiro Saguier, 1980.

<sup>3396</sup> Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).

<sup>3397</sup> En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los corregidores.

<sup>3398</sup> Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

<sup>3399</sup> AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

<sup>3400</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.16, Exp.27.

<sup>3401</sup> *Ibíd.*

<sup>3402</sup> Este calificativo fué profusamente utilizado en otros pasquines que se difundieron para esta época en el Perú (Flores Galindo, 1977, 144).

<sup>3403</sup> Ferrer de Arrellaga, 1985, 23-25.

<sup>3404</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

<sup>3405</sup> Betancur, 1985; y Saguier, 1989, 297-299. Marino, nacido en Lisboa en 1740, hijo de Matias de los Santos Melo de Meneses y de doña María de los Santos Silva, y casado en 1765 con Ana Joaquina de Silva (Cutolo, 1968-85, IV, 516-517). Probablemente influyera en la poesía de Bartolomé Hidalgo.

<sup>3406</sup> Cutolo, 1963, 516.

<sup>3407</sup> AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; Tribunales, Leg. 88, Exp. 29, fs. 74-91v, 191-199, y 246-270v; y Sábat Pébet, 1958, 140-141.

<sup>3408</sup> ver Sábat Pébet, 1958. El *Parnaso Español* forma parte de la obra en verso de Francisco de Quevedo, de la cual hubo sucesivas ediciones. Se conservan de él casi un millar de poemas, pero sabiendo que nunca se preocupó por editarlos y que los conservados proceden de personas próximas a él, es de suponer que escribió muchos más.

<sup>3409</sup> Según Lynch (1953) la payada había sido ya advertida por Concolorcorvo en 1783 (Lynch, 1953, citado en Román, 1957, 111).

<sup>3410</sup> Lúcido abogado, quien se destacó por su versación en la historia de la esclavitud, con motivo del litigio celebrado por un esclavo contra su amo, el Maestro de Música Antonio Vélez, del cual había aprendido a

---

tocar el obóe (AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.12, fs.61-68v.).

<sup>3411</sup> permítasenos citar a Saguier, 1989.

<sup>3412</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 183, Exp. 4, fs. 58-58v, citado en Saguier, 1989, 297-299.

<sup>3413</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.15, Exp.20. Recogido y leído por el Dr. José Vicente Carrancio decía el pasquín los siguientes versos en octosílabos libres:

"Si has quedado satisfecho  
de mi anterior Papelón  
prosigo con la intención  
de lo que quedó en mi pecho  
Vana mente satisfecho  
está desy un Abogado:  
El Sr. Regidor Ramos,  
compone bien una Copla  
Dn. Luis Ramírez lo sopla

por la boca de un embudo:  
Lorente de un estornudo;  
estrellas buelve en cometas:  
de sombrero echa soletas  
a los Zapatos Sanjuan:  
Correa se haorra el Pan  
porque siempre está de dieta:  
con un baile haze la fiesta  
mañana la de Balbastro:  
La Manuela Echabarría,  
ha acortado un poco el paso:  
Mariño y Cuesta trabajan  
día y noche sin cesar;  
Velarde les vá a ayudar,  
y en vela la noche pasan:  
Ybáñez corre esta caza,  
y otro Ybáñez les apunta:  
Zamudio anda de Repunta,  
y en la Quinta les encaja.  
La Peluca de Colina;  
se ha peinado esta semana:  
Dió a luz sus grandes deseos  
Nro. Monigote Arana:  
Carrancio va consiguiendo,  
la gracia de su Compadre  
Cabrera el Viejo alograrse,  
anda siempre pretendiendo:  
Pegose con gran primor  
Medina a los de Palacio:  
No puede gritar despacio  
Aedo porque es de humor:  
Agraciado es el Señor  
Dn Ignacio de Yrigoyen:  
Se eleban todos los que oyen  
producir al Reloxero:  
A la moda es el Sombrero  
con que Azcuénaga se viste:  
este catarro consiste  
de lo que nos acatarran  
quantos han venido agarran

---

para si el mejor remedio:  
se le va aplacando el tedio  
a Dn Bernardo Larrea:  
con los rizos de Jalea  
luze Dn Baltasar Franco,  
y con nabos de Galicia  
pretende poner estanco  
El Doctor Avellaneda  
mandó a París por anteojos:  
de su Preñez los antojos  
matan al doctor Cañete,  
sobrepeliz y bonete  
no hai como la de Mancilla,  
Hecho vá una maravilla  
al Cabildo Tocornal:  
Pura gracia y pura Sal  
el ayre es de Rospillosi:  
parece una cosicosi  
con su bastón Ribadabia:  
Fue soldado en la Moldavia  
el Sr. Dn Juan de Pita:  
Nada el Juicio me quita  
Mas que el Ayre de Pacheco,  
Canta y tiene muy buen eco  
Dn Benito de la Fuente:  
No abrá quien mas bien ostente  
Que el Gallego Figueroa:  
Le vino al Doctor Soroa,  
la reducción de los Pampas:  
Una factura de estampas  
a los Reyes le han mandado  
Pica por lo enamorado  
Dn Francisco de Carnilia,  
mandó traer de Sicilia  
varias semillas Warnes,  
toda variedad de carnes  
olfatea Altolaguirre:  
Le venden en lo de Aguirre,  
las uñas de siete pelos.  
Cuenta muy bien por los dedos  
El Sr. doctor Andújar,  
Con tanto comer azúcar  
perdió los dientes Perales:  
Viene de los doze Pares  
la intrepidez de Sotoca:  
Me cae en gracia la boca  
de Dn Juan de Romanet  
deseo saber por que  
se empeña tanto Albear.  
Es Mro. de tocar  
Pedregal el violín.  
Y esta relación dá fin  
hasta que discurra el arte  
quienes llenarían el blanco  
de la otra tercera parte.

(AGN, División Colonia, Criminales, Sala IX, Leg.15, Exp.20, fs.48-48v.).

<sup>3414</sup> Marquiegui (1990) relata entre otros los casos de las familias Colman, Torres, y López Camelo

---

(Marquiegui, 1990, 31-33).

<sup>3415</sup> Sobrino de Adrián Pedro Warnes y Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefá Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; conuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y Arráez (FB, I, 162; III, 153; y JR, 1989, ítem 5246).

<sup>3416</sup> Nacido por 1732 en Sevilla, hijo de Juan Ramos Mexía y de María Márquez de Velazco; marido en primeras nupcias de Ana María Antonia Conget y Rodríguez de la Mata, y en segundas nupcias de María Cristina de Ros y Pozo (FB, V, 286; y JR, 1989, ítem 4234).

<sup>3417</sup> Bautizado en 1754, hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa Basavilbaso; marido de Justa Rufina Garfias, hija de Manuel de Basavilbaso y Urrutia y de Francisca de Garfias y Gallen; cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, y de Gaspar de Santa Coloma; y suegro de Mariano Lozano y del Virrey Olaguer y Feliú (FB, I, 201; y JR, 1989, ítem 6161).

<sup>3418</sup> Nicoletti, 1987, 103.

<sup>3419</sup> Mayo Documental, IV, 196-199, citado por Halperín Donghi, 1979, 157.

<sup>3420</sup> Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la Portilla (Lafuente Machain, 1941).

<sup>3421</sup> Médico de San Carlos de los Guaraníes, que en 1797 se halla con el título de médico-cirujano del Departamento de Apóstoles (Furlong Cardiff, 1947, 65).

<sup>3422</sup> al igual que del Valle y Caviedes hacía en Lima en el siglo XVII.

<sup>3423</sup> por lo numerosos los versos se incluyen en el Apéndice 0-I (AGN, Justicia, Leg.18, Exp.475).

<sup>3424</sup> Para un análisis de las celebraciones en los pueblos jesuíticos de Guaraníes, ver Wilde, 2001 y 2003.

<sup>3425</sup> Según González y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica "...tendía a la división de poderes y funciones, pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u organismos especializados" (González y González, 1975, 505, nota 40).

<sup>3426</sup> Díaz Cruz, 1998, 237.

<sup>3427</sup> Díaz Cruz, 1998, 275.

<sup>3428</sup> Dworkin, 1988, 47.

<sup>3429</sup> Foucault, 1992, 52. Los antropólogos Gilbert Murray y Jane E. Harrison (discípulos de James G. Frazer) sugirieron a principios del siglo XX que los rituales son "...meras representaciones dramatizadas de los mitos de origen" (Díaz Cruz, 1998, 104).

<sup>3430</sup> Guerra, 1989, 673.

<sup>3431</sup> Para el calendario ritual del federalismo en tiempos de Rosas, ver Salvatore, 2003, capítulo 11.

<sup>3432</sup> Estas ceremonias se oficiaron en ocasión de la aclamación de Carlos III en 1760; del matrimonio del Príncipe de Asturias con la Princesa Luisa en 1767, de la Infanta Carlota con el Infante Don Juan en 1785,

---

del Infante Gabriel con Mariana Victoria en 1785, de la Infanta María Amalia con el Infante Antonio en 1795, y del hijo de Carlos IV con la Princesa María Antonia en 1803; en circunstancias del fallecimiento de Fernando VI en 1760, de la reina María Amalia de Sajonia en 1761, de la reina María Isabel Farnesio en 1767, de Carlos III en diciembre de 1788, y de la Princesa María Antonia en 1806; y en oportunidad de los funerales de Bárbara de Portugal en 1759, del Rey Fernando VI en 1760, de María Amalia de Sajonia en 1761, de la Reina María Isabel Farnesio en 1767, del Rey Carlos III en 1789, y de la Princesa María Antonia en 1807 (AGN, Fondo Documental, Bandos de Virreyes y Gobernadores, 1741-1809).

<sup>3433</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.18.

<sup>3434</sup> Id, fs.22v. Acerca de la polémica por el espacio, ver Leal Curiel, 1990, 189.

<sup>3435</sup> Pagden, 1997, 181.

<sup>3436</sup> Ver Deusdad Ayala, 2001. Sobre el proceso de acortesanamiento indiano, ver el capítulo II-H-22 de este tomo.

<sup>3437</sup> *Ibidem*.

<sup>3438</sup> *Ibidem*.

<sup>3439</sup> Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de Isidro de Murga y de Isabel Núñez de Avila, padres de Visitación Monzón, la cual casara con José Ignacio Gancedo (Avila, 1920, 97; y Corominas, 1987, ítem 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado García, y si salió libre al primer día del arresto, sin habérsele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

<sup>3440</sup> Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y con cuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre.

<sup>3441</sup> AGN, Tribunales, Leg.124, Exp.15.

<sup>3442</sup> Félix Cabrera Celis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteteo de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240; y LC, III, 195).

<sup>3443</sup> AGN, Tribunales, Leg.124, Exp.15.

<sup>3444</sup> Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo

---

Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alferez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; y III, 1969, 145).

<sup>3445</sup> Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Alborno y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Córdoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>3446</sup> Zinny, 1920-21, I, 202.

<sup>3447</sup> Félix Cabrera al Virrey del Perú Manso de Velasco, Conde de Superunda, Córdoba, 27-VII-1754 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3448</sup> *Ibidem*.

<sup>3449</sup> Acevedo, 1972, 253-267.

<sup>3450</sup> R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47. Era hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, y hermano de Juan Agustín, José Santiago, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera. Juan Agustín estaba vinculado con la Casa de los Molina Navarrete pues era casado con María Josefa de Molina y López del Barco. José Santiago estaba ligado a la familia patricia de los Tejeda por estar casado con Bartolina Rosa de Garay y Tejeda, hermana del Teniente Oficial Real Francisco Javier Garay. José Gregorio de Echenique estaba unido a la Casa riojana de los Villafañe por estar casado con Margarita de Villafañe. Catalina de Echenique y Cabrera, la única hermana mujer, estaba casada con el Alcalde Ordinario y encomendero de los indios de Piscoguasi, Sargento Mayor Manuel Noble Canelas y Cortés. Finalmente, Gerónimo Luis estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Fueron padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (Calvo, 1938, III, 229; Lazcano, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

---

<sup>3451</sup> Peninsular, fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

<sup>3452</sup> Ver Mairet, 1981, 52; y Colmenares, 1990, 4; así como Fernández, 1974; y Beck, 1978, citados por Leal Curiel, 1990, 210.

<sup>3453</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.103, Exp.18, fs.22v.

<sup>3454</sup> *Ibidem*.

<sup>3455</sup> *Ibidem*.

<sup>3456</sup> *Ibidem*.

<sup>3457</sup> *Ibidem*.

<sup>3458</sup> *Ibidem*.

<sup>3459</sup> "adorno hecho de cartón aforrado de tafetán u otra tela negra, que circunda el cuello, sobre el cual se pone una valona de gasa u otra tela blanca, engomada o almidonada, y que han usado los ministros togados y demás curiales" (Enciclopedia Universal-Ilustrada Europeo Americana, 26, 515).

<sup>3460</sup> Acuerdos, 3a. Serie, II, 287-288 y 319.

<sup>3461</sup> Acuerdos, 3a. Serie, II, 651.

<sup>3462</sup> Esta misma práctica se observaba en Córdoba, España, bajo la responsabilidad de los llamados santeros (Plata García, 1989, 548).

<sup>3463</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.43, Exp.1261.

<sup>3464</sup> El altarero estaba obligado a "...proporcionar chicha y licores para el consumo de los operarios que construían el altar o para los invitados que honraban el acto con su presencia" (Paredes, 1936, 164).

<sup>3465</sup> Rivera, 1984, citado por Orlove, 1992, 344. Irurozqui Victoriano (1992) cree equivocadamente que la participación de la elite en las festividades religiosas obedece a una estrategia de reconversión de elites iniciada en 1880 y no a un proceso de continuidad colonial (Irurozqui Victoriano, 1992, 340).

<sup>3466</sup> pariente en tercer grado de sanguinidad por línea transversal del Subdelegado Vicente Ramón de Espinosa y Arrasola.

<sup>3467</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.43, Exp.1261.

<sup>3468</sup> *Ibidem*.

<sup>3469</sup> *Ibidem*.

<sup>3470</sup> *Ibidem*.

<sup>3471</sup> Paredes, 1936, 167.

<sup>3472</sup> *Ibidem*.

<sup>3473</sup> *Ibidem*.

<sup>3474</sup> *Ibidem*.

<sup>3475</sup> *Ibidem*.

---

<sup>3476</sup> *Ibídem.*

<sup>3477</sup> ubicada en el solar del actual Jardín Botánico.

<sup>3478</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72.

<sup>3479</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.42.

<sup>3480</sup> *Idem.*

<sup>3481</sup> *Idem.*

<sup>3482</sup> *Idem.*

<sup>3483</sup> *Idem*, fs.43.

<sup>3484</sup> *Idem.*

<sup>3485</sup> *Idem.*

<sup>3486</sup> *Idem*, fs.49v.

<sup>3487</sup> Para su biografía, ver A-Ch, I, 171-172.

<sup>3488</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs. 49v.

<sup>3489</sup> hijo de Sebastián Sotomayor y de Mariana Quintero, y cuñado de José Izaguirre. No era pariente de Mateo Medina.

<sup>3490</sup> Los gastos incluían ceniza de jume y limones, masitos de escarchado para la flores, echura de las composturas de velas y flores, el mulato para armar las gradas del Altar, el toque del violín, la guardia armada (cabo y seis soldados) del Sacramento (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII, fs.18 (Microfilm 5625, depositado en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, copia del existente en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record).

<sup>3491</sup> *Ibídem.*

<sup>3492</sup> *Ibídem.*

<sup>3493</sup> "Las horas canónicas son las divisiones, segmentadas cada tres horas, en que se descompone el día marcadas en base a las oraciones y oficios pertenecientes a cada hito: maitines (medianoche), prima (3 a.m.), laudes (6 a.m.), tercia (9 a.m.), sexta (mediodía), nona (3 p.m.), vísperas (6 p.m.) y completas (9 p.m.)" (Leal Curiel, 1990, 116).

<sup>3494</sup> *Ibídem.*

<sup>3495</sup> *Idem*, fs.60.

<sup>3496</sup> Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII, fs.34 (Microfilm 5625, depositado en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, copia del existente en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record).

<sup>3497</sup> *Idem*, fs.42.

<sup>3498</sup> Legón, 1920, 457.

<sup>3499</sup> Bruno, 1967, VI, 293.

<sup>3500</sup> Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Su primer esposa Ipólita Garay era hermana de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde Provincial Domingo Garay, de Fernando Garay, de Teresa Garay, mujer de José de Ariza, y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

<sup>3501</sup> Sargento Mayor de la Nobleza, Maestre de Campo, casado en 1772 con María Ignacia de Isasi, hija de Don Juan Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, sobrina de Don Nicolás de Azcoeta, y nieta materna de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). La sucesión de Montenegro se abrió en 1775, contándose entre sus bienes numerosos libros (AHC, Escribanía N.1, Leg.384, Exp. 3; Leg.387, Exp.3 y Leg.388, Exp.7; y Furlong, 1944, 66). En 1782 su albacea testamentario Francisco Alvarez reclama a Miguel de Learte entregue \$2.000 que dicho finado dejó para sus hermanos en España (AGN, Tribunales, Leg.31, Exp.44). Doña María Ignacia Isasi fué dotada con \$48.000, enviudó a los cinco meses de casada, y contrajo segundas nupcias en 1776 con el comerciante y aventurero Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama (Learte, 1926, 283 y 304). Viuda por segunda vez entra en enero de 1800 en la Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando como dote una casa de cal y canto avaluada en \$18.000 (Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6).

<sup>3502</sup> AGN, Tribunales, Leg.104, Exp.2. Sobre las bulas de la Santa Cruzada, ver Weckman, 1984, I, 383-385.

<sup>3503</sup> Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1). Acerca del uso de las sillas en las ceremonias, ver Leal Curiel, 1990, 173.

<sup>3504</sup> *Ibidem*.

<sup>3505</sup> *Ibidem*.

<sup>3506</sup> Ver Schwaller, 1981, 651-674.

<sup>3507</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.17, fs.25v.

<sup>3508</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.17, fs.25.

<sup>3509</sup> *Ibidem*, fs.26v.

<sup>3510</sup> *Ibidem*, fs.24.

<sup>3511</sup> *Ibidem*.

<sup>3512</sup> Bruno, 1967, VI, 335.

<sup>3513</sup> Hijo del Maestre de Campo Gaspar de Moscoso y Zegada y de Petronila Pérez de Oblitas, sobrino carnal del Obispo de Santa Cruz de la Sierra Fernando Pérez de Oblitas, y tío de Mariano Díaz Canseco. Cura de San Pedro de Torata en 1758 y fundador de la población de indígenas Yuracaras en 1775.

<sup>3514</sup> con mitra, tunicellas, sandalias, guantes, etc.

<sup>3515</sup> "...Hay dos clases de capa magna: la desplegada y la con tortillón, o que se lleva retorcida. La capa desplegada indica jurisdicción y autoridad y va anexa a la dignidad del papa, de los cardenales y de los obispos en sus diócesis. La papal es de terciopelo, la de los cardenales es de moaré de seda, encarnada o violeta, y la de los obispos es de lana violeta. En el obispo regular el color debe ser el de la orden religiosa a la que pertenece. La capa desplegada sólo puede llevarla el obispo en su diócesis; pero el obispo auxiliar y el

---

sufragáneo pueden usarla en una iglesia de otra diócesis consintiéndolo el obispo de ella: entonces la cola no la sostiene un caudatario, sino que se lleva recogida sobre el brazo izquierdo. Para recibir el obispo los honores del cabildo, debe ir revestido de capa" (Enciclopedia Universal Ilustrada, v.XI, 400).

<sup>3516</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

<sup>3517</sup> *Ibídem.*

<sup>3518</sup> *Ibídem.*

<sup>3519</sup> *Ibídem.*

<sup>3520</sup> *Ibídem.*

<sup>3521</sup> *Ibídem.*

<sup>3522</sup> *Ibídem.*

<sup>3523</sup> *Ibídem.*

<sup>3524</sup> *Ibídem.*

<sup>3525</sup> *Ibídem.*

<sup>3526</sup> *Ibídem.*

<sup>3527</sup> *Ibídem.*

<sup>3528</sup> *Ibídem.*

<sup>3529</sup> Es como una reducción del alba, tiene las mangas estrechas. Para la administración de los sacramentos no es lícito a los sacerdotes usar roquete en vez de sobrepelliz, porque el roquete no tiene carácter litúrgico (Enciclopedia Universal Ilustrada, v.52, 306).

<sup>3530</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

<sup>3531</sup> la cauda era la falda o cola de la capa consistorial de los arzobispos y obispos en el coro.

<sup>3532</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

<sup>3533</sup> *Ibídem.*

<sup>3534</sup> *Ibídem.*

<sup>3535</sup> Levene, 1920, 97. Debo este dato a la amabilidad del poeta y amigo José González Ledo.

<sup>3536</sup> Levene, 1920, 487.

<sup>3537</sup> *Ibídem.*

<sup>3538</sup> Levene, 1920, 494.

<sup>3539</sup> Padre de Pilar de las Heras Canseco, mujer de Antonio de los Santos Gonsález (AHC, Escribanía N.3, Leg.89, Exp.21). Ignoro el parentesco de Don Antonio con el comerciante Bernardo Gregorio de las Heras y con el estudiante Mariano Díaz Canseco, sobrino del Obsipo Moscoso.

<sup>3540</sup> En 1777 lo demanda por calumnias Carlos Estela (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13).

---

<sup>3541</sup> Era el Regidor José Manuel Gerónimo Salguero casado con Josefa de Moynos y Ledesma, cuñada de Francisco Hurtado de Mendoza, y prima hermana de Domingo Ignacio de León, y de María Teresa de Estéban León y Ledesma, mujer del General Prudencio Palacios. Fueron padres del Congresista de Tucumán Gerónimo de Salguero (Díaz de Molina, 1966; y LC, 1969, III, 293). Fué dueño de la estancia de Los Dos Ríos, y tuvo serios pleitos con José de Isasa, el dueño de La Candelaria (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Expediente 15).

<sup>3542</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.48.

<sup>3543</sup> *Ibidem*, fs.48.

<sup>3544</sup> La Real Audiencia de Buenos Aires fué fundada en 1783 (Socolow, 1987, 289-90).

<sup>3545</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp.7, fs.83.

<sup>3546</sup> AGN, Intendencia de Córdoba, 1806-07, Sala IX, 6-1-3. Debo esta referencia a la generosidad del Prof. Oscar Adolfo Chamosa.

<sup>3547</sup> *Ibidem*.

<sup>3548</sup> *Ibidem*.

<sup>3549</sup> *Ibidem*.

<sup>3550</sup> *Ibidem*.

<sup>3551</sup> *Ibidem*.

<sup>3552</sup> *Ibidem*.

<sup>3553</sup> Sobre el patriarcalismo en la América colonial española, ver Pagden, 1997, 197-198.

<sup>3554</sup> este nuevo sentido ha sido subestimado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos.

<sup>3555</sup> Concolorcorvo, 1942, capítulo II, 47. Su verdadera identidad era Alonso Carrió de la Vandra. Acerca de este descubrimiento ver Real Díaz (1956), Vargas Ugarte (1961-63), Borello (1982), y Díaz-Jove Blanco (1993).

<sup>3556</sup> Con respecto al igualitarismo vigente en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, para Zuckerman (1994), la obra de Wood (1992), acerca del radicalismo de dicha Revolución, subestima el rol jugado por las opresiones sufridas por las minorías raciales y de género (Zuckerman, 1994, 698). Sin embargo, Wood ha replicado sosteniendo que en el mundo pre-moderno existió una opresión general que subsumía las opresiones sufridas por los esclavos y las mujeres, que comprendía no solo a estos últimos sino también a la gran mayoría de los varones blancos, y que su eliminación debía necesariamente preceder a la sufrida por los negros y las mujeres (Wood, 1994, 706-707). Debo esta referencia a la gentileza de mi colega Carlos A. Mayo. Más aún, Huston (1993) refiere que la teoría acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana estaba fundada en cuatro axiomas: 1) la teoría de la propiedad o valor del trabajo; 2) la política económica de la aristocracia; 3) las leyes de la primogenitura; y 4) la proporción de población por superficie de tierra. De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar dicha distribución de riqueza fueron los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, el favoritismo gubernamental, la erección de una iglesia oficial, y la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

<sup>3557</sup> La causa principal del desprestigio de la nobleza la veía Jovellanos –quien a su vez se hallaba muy impregnado del pensamiento fisiocrático– en los mayorazgos y en las Leyes de Toro, cuya Ley 40 incorporaba el derecho de representación. Puesto que para fundar un mayorazgo no se requirió mas la calidad de noble, cualquier familia de mediana fortuna encontró en esta liberalidad una puerta para incorporarse a la

---

hidalguía (Millar, 1978, 86). Esta tesis, Millar la confirma con la lectura de Vicens Vives, 1969, 307; Clavero, 1974, 126-128 y 136; y Domínguez Ortiz 1973, 118. Sorprende que no cite a González (1945).

<sup>3558</sup> Azara, 1982, t.II, cap.XV, p.272, citado por Ramos Mexía, 1915, 198.

<sup>3559</sup> Brackenridge, 1927, 182 y 283.

<sup>3560</sup> En el sentido señalado por Shumway (1992).

<sup>3561</sup> Mitre, 1940, VI, 58-60; y Alberdi, 1886, volumen IV, II Parte, Capítulo II, p.262.

<sup>3562</sup> si bien por matrimonio con Doña Lucía Petrona Riera y Merlo pertenecía a la élite política y mercantil porteña, por sus padres no lo era. En efecto, era hijo de Domingo López, natural del Valle de Bedoya, Obispado de Palencia, sobrino de Alejo, Pascual y Miguel Planes, este último dueño de una casa-panadería, y nieto materno de José Planes y Francisca Javiera Espinosa. Esta última, su abuela materna, natural de Buenos Aires, habría sido hija natural de Andrés Espinosa y Antonia de Melo. Esta sospecha la infiere del hecho que su partida matrimonial no menciona a sus padres (JR, ítems 4591 y 5766; y FB, IV, 312).

<sup>3563</sup> López, 1913, I, 425.

<sup>3564</sup> Ramos Mexía, 1915, 194.

<sup>3565</sup> Azara, 1982, 274.

<sup>3566</sup> *Ibidem*.

<sup>3567</sup> Debo esta reflexión al diálogo que mantuve con mi amigo poeta José González Ledo, asiduo lector de Augusto Barcia Trelles.

<sup>3568</sup> estos podían ser agnáticos o cognáticos, siendo los primeros un sistema de descendencia unilineal simple, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre eran distintos a los mantenidos para con los parientes de la madre; y los segundos un sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre o de la madre son muy similares.

<sup>3569</sup> ver Lavrin, 1985, 46; Socolow, 1991; y Andreucci Aguilera, 2000.

<sup>3570</sup> facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>3571</sup> Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>3572</sup> Permítaseme citar mis propios trabajos publicados en 1990 y 1992.

<sup>3573</sup> descendiente del comerciante español Manuel de Palacio y Amavíscar, afincado en Santiago del Estero, que lucró a comienzos del siglo pasado con el comercio a larga distancia con Buenos Aires. Manuel Palacio y Amavíscar mantuvo entre 1777 y 1793 reiterados vínculos comerciales con el comerciante porteño Juan Antonio de Lezica:

Monto	Reg.	Año	folio
4.057 6		1777	383v.
13.744	6	1784	89v.
9.632	6	1787	284
9.834	6	1789	204

---

2.167	3	1790	36
20.516	6	1793	12v.

(Fuente: AGN, Protocolos).

<sup>3574</sup> Palacio, 1965, I, 138.

<sup>3575</sup> Zorraquín Becú, 1961, 63. Según Heisse, "la independencia fué una revolución puramente política: reemplazó la monarquía por la república y la burocracia metropolitana por la criolla. No produjo cambio alguno en la estructura social, ni en la vida económica, ni en la mentalidad del chileno" (Heisse, 1951, 44).

<sup>3576</sup> Romero, 1946, 1956, 50; Corona Baratech, 1951, 120; y Molina, 1991, 48.

<sup>3577</sup> Mariluz Urquijo, 1970, 62.

<sup>3578</sup> Halperín Donghi, 1979, 64.

<sup>3579</sup> Socolow, 1978, 102.

<sup>3580</sup> Socolow, 1978, 32.

<sup>3581</sup> Mörner, 1989, 122.

<sup>3582</sup> Sobre el patriarcalismo en la América colonial española, ver Pagden, 1997, 197-198.

<sup>3583</sup> este nuevo sentido ha sido subestimado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos.

<sup>3584</sup> Saguier, 1992d, 1992e, y 1992f.

<sup>3585</sup> Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

<sup>3586</sup> De ahora en más identificado con las siglas AAC, sus copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente dicho Centro no ha podido microfilmear aún los Libros de Capellanías de los obispados de Tucumán, Mendoza y Santa Fé. Los Libros de Capellanías proveen de valiosa información acerca de la edad, estado civil e identidad de parientes próximos y remotos de los fundadores, los patronos y los capellanes, incluidos los grados de parentesco. Asimismo, nos provee de información acerca de los bienes incorporados a la fundación, la capilla o iglesia elegida como sede de la capellanía, la festividad elegida para celebrar misas en homenaje del alma del fundador, los valores de casas y tierras, y los precios de insumos gastados en celebraciones.

<sup>3587</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Jáuregui Rueda, Vásquez Mansilla y Avellá-Cháfer, estos últimos identificados de ahora en más con las siglas VM y A-CH.

<sup>3588</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza, quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata, de ahora en más identificado con las siglas FB.

<sup>3589</sup> En el incendio se perdieron definitivamente los Libros de Capellanías (parcialmente sustituibles por la información existente en los archivos civiles notariales y judiciales); las Cartas y Notas de los Curas Párrocos a los Obispos; los Juicios Eclesiásticos; los Libros de Concursos a Curatos y Oposiciones; las Dimisorias para Ordenes; las Informaciones Matrimoniales; los Divorcios y Nulidades de Matrimonios, parcialmente reproducidos en Molina (1991); y los Juicios por Esponsales. Si tenemos en cuenta que en Buenos Aires se registraron notarialmente en los siglos XVII y XVIII 757 capellanías, los Libros de Capellanías deben haber

---

sido numerosísimos. A propósito de dicho crimen, el Profesor Néstor Tomás Auza nos informó que en aquellos meses aciagos de 1955, cuando la posterior agresión se veía venir, jóvenes de la Acción Católica se ofrecieron al Cardenal Copello para clandestinamente sacar los legajos del Archivo de la Curia y ponerlos así a buen recaudo, propuesta a la cual el Cardenal Primado se negó.

<sup>3590</sup> cada una de ellas conllevaba promedio un capital de \$2.000 y una renta anual de \$100.

<sup>3591</sup> Saguier, 1992d.

<sup>3592</sup> En Buenos Aires, la afiliación a las ordenes terceras o religiosas por parte de los comerciantes locales estaba a la orden del día. Socolow (1978) cuenta que al menos un 40% de los comerciantes porteños pertenecían a las "terceras ordenes".

<sup>3593</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe), t.68, p.1669.

<sup>3594</sup> Bazant, 1984, 198.

<sup>3595</sup> Id., p.199.

<sup>3596</sup> La colación es la libre concesión de un beneficio vacante hecho por autoridad eclesiástica. Es una de las cuatro formas de proveer beneficios eclesiásticos. Las otras tres son la elección o llamamiento, la nominación y la presentación.

<sup>3597</sup> "...Capellania non est sacerdotales etiam si habeat annexum omis Missarum, nisi ex voluntate fundatoris contrarium constet" [Cardenal de Luca, Libro 12, De Benefice, Discurso 61, n.3 y 4] (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.101 [Microfilm 2677, del CHF].

<sup>3598</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

<sup>3599</sup> hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).

<sup>3600</sup> padre del Pbro. Juan Tomás Rodríguez.

<sup>3601</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-12, Exp. 28, fs. 97v.; y Tribunal Civil, Leg.R, N.3, "Julián Clemente Rodríguez c/Igareda, Nicolás".

<sup>3602</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

<sup>3603</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.R-51, "Lorenzo Rodríguez Conde s/redención de capellania lega".

<sup>3604</sup> *Ibidem*.

<sup>3605</sup> "A dev est necessaria presentatio in beneficio Patronato est si collatio fiat ab Episcopo patrono reclamante nula omnino sit" (Murillo, 1765, Vib 3, Decretal n.337, citado en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 [Microfilm 2677, del CHF]). Los libros de Murillo los poseyeron las bibliotecas de los Protectores de Indios de la Audiencia de Charcas Antonio Porlier, y Miguel Martínez de Escobar y Coronado, y la del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Miguel Lápez Andreu (Ripodas Ardanaz, 1975, 530).

<sup>3606</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

<sup>3607</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.16 (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>3608</sup> *Ibidem*.

<sup>3609</sup> FB, I, 140.

---

<sup>3610</sup> Hijo del Oficial de las Reales Cajas de la Villa de Oruro Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Tomasa de Arce y Báez de Alpoim (FB, III, 164).

<sup>3611</sup> Hijo del Brigadier Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoim (FB, V, 206).

<sup>3612</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban"; y Archivo Histórico de la Provincia, Catálogo de la Real Audiencia, Recurso de Fuerza, Leg.12, 7.5.12.16.

<sup>3613</sup> Hijo del Oficial de Marina Pablo de Valdéz y de María Tomasa de Arce y Báez de Alpoim (FB, VI, 224).

<sup>3614</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban".

<sup>3615</sup> Idem.

<sup>3616</sup> sobrino-nieto de Bernardina Toranzos y Montenegro.

<sup>3617</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

<sup>3618</sup> Ibídem.

<sup>3619</sup> marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

<sup>3620</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, "Caviedes, Dámaso s/redimir en fondos públicos una capellanía", fs.4.

<sup>3621</sup> Escriche, 1863, 95.

<sup>3622</sup> Diccionario Jurídico Omeba, t.XXIV, 706.

<sup>3623</sup> "...In Capellani enim nom est sucedendum per representationem, sed quilibet ex sua persona" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.43v. [Microfilm 2680, del CHF]).

<sup>3624</sup> hijo de Ambrosio Funes, y sobrino carnal del Deán Gregorio Funes (Altamira, 1947).

<sup>3625</sup> nacido en Buenos Aires, 1777; se graduó de Bachiller en Teología en Santiago de Chile; Profesor titular de Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires, hijo de Juan José Andrés Banegas y de Justa Bartola Lobo, y cuñado del escribano Mariano García de Echaburu (FB, I, 217; Fuenzalida Grandón, 1972, 623; y Avellá-Cháfer, I, 195).

<sup>3626</sup> ficción legal que "...produce el efecto de hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese" (Escriche, 1863, 95).

<sup>3627</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X, fs.123 (Microfilm 5620, del CHF).

<sup>3628</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

<sup>3629</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

<sup>3630</sup> hija de Manuel Muñoz y Pérez.

<sup>3631</sup> hija de Francisco Muñoz y Pérez y de Ana Lorenza Giménez de Paz, y hermana del Pbro. Justo Muñoz y Pérez y de Manuel, Margarita y Angela Muñoz y Pérez (FB, IV, 410; ver Fandiño, 1992, 165).

<sup>3632</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, año 1797, fs.377.

---

<sup>3633</sup> AGN, Tribunales Civiles, Leg. M-8, fs.24.

<sup>3634</sup> hija de Ezequiel Echenagucia, y nieta de Florencia Miguens (datos proporcionados por nuestro colega Porfirio Rodríguez Miguens).

<sup>3635</sup> natural de Galicia, y marido de Juana Paula Reynoso, hija de José Reynoso y de Engracia Barragán (FB, IV, 342).

<sup>3636</sup> Miguens, 1907, 38. Debo el conocimiento de este folleto al nieto del autor del mismo, el investigador Porfirio Rodríguez Miguens. Posteriormente, tomé conocimiento que Levaggi hace alusión a este fallo (Levaggi, 1992, 377). Al Fiscal Quesada se le hallaron irregularidades en el desempeño de la Fiscalía a su cargo (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1924, II, 591).

<sup>3637</sup> Idem, 39.

<sup>3638</sup> Ibidem.

<sup>3639</sup> integrada por los Dres. Juan Gelly, Carlos Molina Arrotea y Luis Méndez Paz.

<sup>3640</sup> hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

<sup>3641</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan Rodríguez (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

<sup>3642</sup> hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

<sup>3643</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

<sup>3644</sup> hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668, del CHF]).

<sup>3645</sup> marido de María Dominga Carreño Bazán, y padre de Juan Manuel de Castro Carreño, colegial en el Seminario de Monserrat.

<sup>3646</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

<sup>3647</sup> Idem, fs.18.

<sup>3648</sup> Ibidem.

<sup>3649</sup> Ibidem.

<sup>3650</sup> natural de la Colonia del Sacramento; hijo de Eufasia María de la Concepción Fernández; marido de María Gregoria Ortiz; y hermano de Micaela y Ana de Acosta (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF]).

<sup>3651</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.M, N.57, "Martínez, Juan Antonio s/patrón de capellanía eclesiástica".

<sup>3652</sup> hijo de Francisco Ignacio Oliden y de María Teresa Renniell e Illescas; y marido de Ida Chavarría (FB, V, 59).

---

<sup>3653</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.F, N.15, "Franco de la Isla, Anastasia c/Matías Oliden s/patronato".

<sup>3654</sup> hija de Cayetano Artayeta y de Dolores Hurtado Zuloaga, viuda del Teniente Coronel Francisco Bermúdez (FB, IV, 44; y VM, 1988, ítem 4450),

<sup>3655</sup> hijo de Francisco Javier de Jaunzaras, nacido en Guipúzcoa, y de Inés de Escobar y Ruiloba (FB, II, 292; y IV, 81); primo de María Cristina San Martín, a quien dona el usufructo de todos sus bienes; y padrino de Petrona Catalina Martínez, natural de Santiago del Estero, hija legítima de Juan Mateo Martínez y de Teodora de Paz, y mujer de Martín Muñoz y Perales, natural de Córdoba la Llana (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp.3, fs.20; y JR, 1989, ítem 5818).

<sup>3656</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.226, "Artayeta Hurtado, Emma c/Artayeta Hurtado, Julia s/patronato de una capellanía", fs.30.

<sup>3657</sup> fundó las capellanías "...con créditos que dejaba a cobrar, uno de ellos, de \$600 pagado por D. Bartolomé del Cano en 1794 y otro de \$6.387 adeudado por el Cabildo de Buenos Aires, más sus intereses que ascendían a \$6.001. A este crédito de principal e intereses de \$12.339 pesos se le dió el premio de \$6.194, haciendo el todo \$18.583 pesos que se pagaron en fondos del 4%. Esos dineros entretanto no se pudieron cobrar por Don Manuel Basavilbaso, y vino recién a recibirlo en 1801 el Brigadier Azcuénaga según un ligero apunte hecho en sus papeles" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.254).

<sup>3658</sup> Disposit. 9, 1a. @1o., n.2 y 3, 70, y 101.

<sup>3659</sup> De primogeniis, Libro 1o., Cuaderno 6o., n.38. Este libro lo poseyó Don Manuel Cipriano de Melo (Sébat Pébet, 1958, 152).

<sup>3660</sup> sistema de parentesco unilineal simple donde los deberes y obligaciones para con los parientes del padre son privilegiados respecto del de la madre.

<sup>3661</sup> por sucesión regular se entendía el vínculo cognativo, que no excluía a las hembras y sus descendientes.

<sup>3662</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.35.

<sup>3663</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.54v.

<sup>3664</sup> *Ibidem*, fs.55.

<sup>3665</sup> hijo natural del Capitan Simón González de Acosta y de Catalina Cabezas; marido de María Espinosa; y padre natural de Mariana, Marcos, Constanza y José González Cabezas (FB, III, 260).

<sup>3666</sup> hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).

<sup>3667</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.C-12, Exp.28.

<sup>3668</sup> Familia de origen santafesino.

<sup>3669</sup> hija de Pedro del Casal Verón y Andrada y de Maria Gómez de Sanabria, viuda del Teniente de Rey Baltasar García Ros, y Abadesa del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba.

<sup>3670</sup> hijo del Capitán Juan de los Ríos y Gutiérrez, burgalés, y de Ana Delgadillo y Atienza, natural de Santa Fé (Avellá-Cháfer, I, 153).

<sup>3671</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

<sup>3672</sup> Para su descendencia ver Alvarenga Caballero, 1978.

---

<sup>3673</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8. Para la descendencia de Lázaro Umeres ver Crespo Naón, 1983.

<sup>3674</sup> Idem.

<sup>3675</sup> Hijo de Ambrosio Zamudio y de María Francisca Díaz (FB, VI, 307).

<sup>3676</sup> hijo de Juan Gregorio de Zamudio y de Juana Josefa de Sarria y Gutiérrez (FB, VI, 308).

<sup>3677</sup> hija de Francisco de Arroyo y Arteaga y de Gregoria Ponce de León (FB, IV, 34).

<sup>3678</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

<sup>3679</sup> González Ruiz, 1950, 480.

<sup>3680</sup> hija de Bernardino de Oro y Bustamante, nacido en San Juan, y de Petrona Josefa de Cossio y Terán (FB, V, 77).

<sup>3681</sup> Hijo de Manuel Vicente de la Colina y Prado y de María Isabel de Oro (Avellá-Cháfer, I, 205-206).

<sup>3682</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.C, N.45 "Colina, Tomás de la p/patronato de capellanía".

<sup>3683</sup> marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

<sup>3684</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4.

<sup>3685</sup> Idem.

<sup>3686</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, "Cueli, Agustín c/ Cueli, Fabián".

<sup>3687</sup> Ibídem.

<sup>3688</sup> Idem.

<sup>3689</sup> Idem.

<sup>3690</sup> Idem, fs.98.

<sup>3691</sup> Ibídem.

<sup>3692</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.97.

<sup>3693</sup> marido de Manuela Basavilbaso (FB, III, 145).

<sup>3694</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

<sup>3695</sup> Hijo de Prudencio Zavaleta, nacido en Guipúzcoa, y de María Agustina de Indá y Martínez de Tirado (FB, VI, 315).

<sup>3696</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.291v.; y FB, I, 115; y VI, 117.

<sup>3697</sup> hija de Atanasio Gutiérrez y María Josefa Zavaleta.

<sup>3698</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.249, "Arzobispo de Buenos Aires, solicitando el patronato de una capellanía", fs.1.

<sup>3699</sup> hijo del Capitán Francisco de la Fuente y de Petronila Luján de Medina; hermano de Josefa de la Fuente,

---

mujer de Gabriel Baygorri; y sobrino de Manuela y Antonia de Luján.

<sup>3700</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II (Microfilm 2679, del CHF).

<sup>3701</sup> Corregidor de Mendoza entre 1730 y 1731, hijo del Capitán Manuel Zapata de Mayorga y de Damiana de Molina Basconcelos; marido de Cecilia Pintos y Almada; cuñado de Juan de Oro Lizarraburu; y suegro de Sebastián Pérez de Asiain, Francisco de Espinoza y Ventura Ladrón de Gueara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 351).

<sup>3702</sup> descendiente de Ramón Zapata, hijo de Manuel Zapata.

<sup>3703</sup> hijo de Fernando Güiráldez y de Isabel Zapata, y nieto del Capitán José Ignacio Zapata y de Josefa Yepes Castellanos (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 354).

<sup>3704</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF).

<sup>3705</sup> *Ibidem*.

<sup>3706</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban".

<sup>3707</sup> *Idem*.

<sup>3708</sup> *Idem*.

<sup>3709</sup> hija del Capitán Diego Martínez Tirado y de María Gutiérrez de Vargas y Agüero (FB, IV, 291).

<sup>3710</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

<sup>3711</sup> Hijo de Eusebio de Espinosa y Sanabria y María Martínez de Tirado; marido de Teresa Zapata, natural de Mendoza; y padre de Juan Antonio y María Espinosa, mujer de Miguel Cotarro (FB, II, 296).

<sup>3712</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

<sup>3713</sup> *Idem*.

<sup>3714</sup> Francisco de Castro: Discurso crítico sobre las leyes y sus intérpretes (Madrid, 1765). Ver para más detalles acerca del uso de genealogías en la antigüedad, a Bouquet (1996).

<sup>3715</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.1 (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>3716</sup> hijo de José Manuel Salguero de Cabrera y de Josefa de Moinos y Ledesma; y hermano del Congresal de Tucumán Gerónimo Salguero de Cabrera (Díaz de Molina, 1966, 163-166).

<sup>3717</sup> hermana de Félix de Cabrera, hija de Pedro Luis de Cabrera, y nieta del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.

<sup>3718</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>3719</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

<sup>3720</sup> nieto del vecino de Tucumán Pedro Bazán Ramírez y Pedraza.

<sup>3721</sup> hijo del Maestre de Campo Francisco Dávila Salazar y María Gutiérrez Gallegos.

<sup>3722</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

<sup>3723</sup> Hijo de Antonio Reynal y de Francisca Javiera Dávila y Laciari (FB, VI, 345).

---

<sup>3724</sup> nacido en Valdemor, España; contrajo primeras nupcias con Antonia de la Fuente y Zevallos, hija de Francisco Martín de la Fuente y de María Josefa Zevallos; y segundas nupcias con Mariana Fernández de Agüero, hija de Amador Fernández de Agüero y de Petrona Cabral de Melo (FB, II, 208).

<sup>3725</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.P-5, Exp.6.

<sup>3726</sup> hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de María Martínez Pantoja y González Cabezas (FB, V, 364).

<sup>3727</sup> hijo de Pedro Alcántara Rodríguez.

<sup>3728</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp.14, fs.26v.

<sup>3729</sup> *Ibidem*.

<sup>3730</sup> hija del Coronel Juan Ignacio de Elía y de Bárbara García de Zúñiga (FB, II, 275).

<sup>3731</sup> marido de Josefa de Lizola y Escobar, hija de Juan Martín de Lizola y de Ana Escobar y Gutiérrez de Paz; y concuñado de Alonso García de Zúñiga, marido de Juana de Lizola y Escobar (AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.23; y FB, II, 291).

<sup>3732</sup> dispensado el parentesco de afinidad en el primer grado por línea transversal proveniente de cópula lícita (JR, 1989, ítem 7403).

<sup>3733</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.61.

<sup>3734</sup> hija del Capitán Francisco de Bazurco y de Juana María de Herrera y Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires José Antonio Bazurco y del Tte. Cnel. Juan Francisco de Bazurco (FB, I, 252).

<sup>3735</sup> hijo del Dr. Antonio Basilio de Aldao y Rendón y de María Josefa Aragón y Avendaño; y sobrino político de Félix de Esquivel, Juan Manuel de Labardén y Manuel de la Quintana (FB, I, 62).

<sup>3736</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A-14.

<sup>3737</sup> Maestro de Campo, Regidor y Alcalde, nacido en San Pedro Abanto; marido de Francisca Arias de Molina y Jofré, hija de Bernardo Arias de Molina Videla y de Catalina Jofré de la Barreda; y suegro de Petrona Sanchez del Carril, Paula Echegaray Cano, Jose Luciano Fernández Balmaceda y Teresa Blanco Echegaray (Calvo, V, 249).

<sup>3738</sup> fundada en 1753 por Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda.

<sup>3739</sup> Verdaguer, 1931, I, 594, 602 y 626; y en el AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

<sup>3740</sup> Verdaguer, 1931, I, 626.

<sup>3741</sup> hijo de Juan Videla y Catalina Albarracín, y nieto de Cornelio Albarracín y Juana Irrazábal.

<sup>3742</sup> nieto de Bernarda Irrazábal.

<sup>3743</sup> nieto de Josefa Irrazábal.

<sup>3744</sup> hijo de Remigio Albarracín y Josefa Irrazábal.

<sup>3745</sup> hija de José Irrazábal y Navarrete y de María Sánchez de Loria y Guardia (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.182, Exp.4 y 5).

---

<sup>3746</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X (Microfilm 5620, del CHF).

<sup>3747</sup> Reyes Gajardo, 1940, 176.

<sup>3748</sup> hijo de José Arias Rengell y de María Pardo de Figueroa; hermano de Felix Arias Rengell; y cuñado de José Ruiz de los Llanos y de Justo Saravia Martínez Sáenz; y contrajo primeras nupcias con Isabel Torino de Viana y segundas nupcias con Zenona López de Villanueva (Calvo, I, 89).

<sup>3749</sup> Cornejo, 1945, 202; y Vergara, 1946, 32-33. En primer Patrono de la Capellanía se había constituido el propio fundador, Pbro. Juan José Arias, y en adelante su primo el Pbro. Fernando Arias Rengel, o en caso de faltar la línea de Don Francisco Gabino Arias Rengel (hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria Hidalgo Montemayor; y marido de Feliciano Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía que entraría su otro primo Don Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

<sup>3750</sup> Fasolino, 1963-65, 29.

<sup>3751</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89. Los patronatos que fundó el Dr. Pedro de las Cuentas y Valverde se hallaban distribuidos en cuatro Ramos: el primero y principal de \$1.050, que se pagaba anualmente en las Reales Cajas de Nuestra Señora de La Paz como producto de \$21.000 que recibió a censo la Real Hacienda; otro segundo de \$96 que pagaba la Hacienda nombrada Sapan, cita en el Valle de Carabillo, donde están impuestos \$3.195 al 3%; otro tercero de \$120 por el principal de \$4.000 impuestos en una casa frontera a la del Sr. Dr. Miguel Núñez de Sanabria, Oidor que fué de la Real Audiencia de Charcas; y último otros \$2.000 a favor de las buenas memorias de Dotes para remediar Doncellas impuestas en una Hacienda cita en la Villa de Pisco por el Alf. José Rodríguez Calero, y en nombre de Doña Lorenza de las Casas su mujer, que hoy dicen que es de Juan Cabero (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3).

<sup>3752</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

<sup>3753</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>3754</sup> Saguier, 1984b, 491-515; y Sánchez Bella, 1989, 445.

<sup>3755</sup> provisión de curatos y beneficios, declaración de sedes vacantes, administración de haciendas, censos y capellanías, cobro de oblacones y limosnas, distribución de la renta eclesiástica, laudo en litigios eclesiásticos, concurso de canongías, designación de Diputados o vocales en las Juntas Municipales de Propios y Temporalidades, y supervisión y control de la educación superior.

<sup>3756</sup> privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial o protocolo religioso.

<sup>3757</sup> Fisher, 1981, 52 y 59; y 1990, 640.

<sup>3758</sup> Gardella, 1968, 153-160.

<sup>3759</sup> para integrar el Santo Oficio de la Inquisición sus miembros debían someterse a las pruebas de la limpieza de sangre, practicadas por sus propios Alguaciles (Lewin, 1950, 91-92). Sobre el fuero universitario, ver Torremocha Hernández, 1991, 128.

<sup>3760</sup> Medina, 1945, 59, cit. por Lewin, 1950, 93.

<sup>3761</sup> Los miembros de las Cofradías eran inmunes a la jurisdicción civil en materia criminal (Russell-Wood, 1974, 175).

<sup>3762</sup> Giddens, 1977, 274.

<sup>3763</sup> Gibson, 1966, 80.

<sup>3764</sup> Sobre el Real Patronato Indiano, ver Weckman, 1984, I, 383-385.

---

<sup>3765</sup> partidarias del control estatal de la Iglesia.

<sup>3766</sup> Febronio, 1770-74, 1781; Parras, 1783; Gorriti, 1836; Vigil, 1848/49; Alberdi, 1895, 279-280; López, 1883, I, 3877; y 1891, 80-83; González, 1897, 155-156; Bunge, 1913, 277-278; y Vélez Sársfield, 1919, 90-91.

<sup>3767</sup> Gual, 1852; Estrada, 1871, 193-260; Ayarragaray, 1920; Carbia, 1914; y Legón, 1920.

<sup>3768</sup> Justo, 1945, 145-227; Bagú, 1949, 80 y 89; Furlong, 1954, 64; y Choy, 1985, 247.

<sup>3769</sup> Guerra, 1989, 673.

<sup>3770</sup> Levaggi, 1971, 45.

<sup>3771</sup> recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez de la jurisdicción eclesiástica para que disponga que este último alce la fuerza o violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su declinatoria (Gardella, 1968, 99-103).

<sup>3772</sup> Cabral Texo, 1952, 99; Hera, 1960, 570-571; y Levaggi, 1971, 46.

<sup>3773</sup> Levaggi, 1971, 45.

<sup>3774</sup> Tibesar, 1982, 209.

<sup>3775</sup> Rodríguez Valencia, 1957; Shiels, 1961; y de la Hera, 1963.

<sup>3776</sup> Isern, 1936, 34-39.

<sup>3777</sup> Medina, 1899, cap. 6; Ingenieros, 19; Rojas, 1948, cap. preliminar, secc. 4; Garretón, 1933, 271-275; y Cervera, 1939, 193.

<sup>3778</sup> Torre Revello, 1948, 107; y Cutolo, 1955, 134-136.

<sup>3779</sup> Ello obedecía a la corriente conciliarista en boga en la iglesia católica. Acerca del conciliarismo, ver Ullmann, 1999, 208-211.

<sup>3780</sup> Armas Medina, 1953, capítulo 9; Bruno, 1967, 180; y Rivera Pizarro, 1971, capítulo 2.

<sup>3781</sup> Levillier, 1926, 9-78.; y Ripodas Ardanaz, 1973.

<sup>3782</sup> Mateos, 1970, 327-328.

<sup>3783</sup> Carbia, 1914, 56.

<sup>3784</sup> Velasco, 1964, 88-130; y García Quintanilla, 1964, 156-67.

<sup>3785</sup> ver Orgaz, 1922, 76; Carbia, 1914, 81-83; y Bruno, 1967, 125-126.

<sup>3786</sup> Una bula de composición consistía en la remisión del castigo temporal aun debido al pecado luego de la absolución sacramental, ya sea en este mundo o en el purgatorio. Prácticamente, la bula de composición se manifestaba a sí mismo como un corte en los días del castigo que debían ser cumplidos en el purgatorio (ver Martínez Reyes, 1980, 401; y Romano y Tenenti, 1971, 214. Para más detalles e interpretaciones sobre este extraño y oscuro caso, ver Vainikoff,

<sup>3787</sup> Escriche, 1863, 737.

<sup>3788</sup> Sierra, op. cit., 157.

---

<sup>3789</sup> Acuerdos, 10, 147-152; y Peña, 1911, 43 y 47.

<sup>3790</sup> Levillier, 1935-42.

<sup>3791</sup> Santillan, 1928, capitulo 3.

<sup>3792</sup> Acerca de las deportaciones de sacerdotes por el poder secular, ver Farriss, 1968, 48-59.

<sup>3793</sup> Carbia, 1914, 283-284.

<sup>3794</sup> Carbia, 1914, I, 45; Bruno, I, capitulo 6; y Sierra, op. cit., I, 420-423;

<sup>3795</sup> ver Bruno.

<sup>3796</sup> Acuerdos, 3, 346.

<sup>3797</sup> Acuerdos, 4, 205.

<sup>3798</sup> Acuerdos, 5, 254-62.

<sup>3799</sup> Peña, 1916, 42.

<sup>3800</sup> Acuerdos, 5, 124.

<sup>3801</sup> Acuerdos, 5, 283-285.

<sup>3802</sup> Cervera, 1907, 362-67.

<sup>3803</sup> Carbia, 1914, I, 60; y Sierra, I, 539-42.

<sup>3804</sup> Carbia, 1914, I, capitulo 4.

<sup>3805</sup> Mariel de Ibáñez, 1946, 135; ver también Ponce, 1939.

<sup>3806</sup> Olaechea Lavayén, 1977, 501.

<sup>3807</sup> Olaechea Labayen, 1977, 501.

<sup>3808</sup> Una vez que el primer obispo, Fray Pedro de Carranza, arribo a Buenos Aires en 1620, la Bula de Ereccion fue promulgada. Este documento proveyo para la formacion de un capitulo catedralicio de cuatro miembros llamados prebendados. En Buenos Aires, el capitulo catedralicio consistio en solo dos rangos: las dignidades y los canonicos. Entre los anteriores estaba el diacono y el archidiacono.

<sup>3809</sup> Schwaller, 1981, 655.

<sup>3810</sup> Avella Chafer, 1976, 321.

<sup>3811</sup> Recopilacion de Leyes de los Reinos de Indias, libro 1, titulo 16, ley 23.

<sup>3812</sup> Carbia, 1914, 132.

<sup>3813</sup> Torre Revello, El libro como factor, 31.

<sup>3814</sup> Armas Medina, Cristianizacion del Peru, capitulo 17.

<sup>3815</sup> Velasco, El Concilio..., 88-130.

<sup>3816</sup> Bruno, 2, 151-154.

- 
- <sup>3817</sup> Peña, Francisco de Cespedes..., 25.
- <sup>3818</sup> Bruno, 2, 151-152 y 159-160.
- <sup>3819</sup> Bruno, 3, 28; y Actis, 1943-44, I, 42-43; y Molina, 1961, 112-113.
- <sup>3820</sup> Ayala y Delgado, 1949, 426.
- <sup>3821</sup> Medina, 1899; 1887; y 1905.
- <sup>3822</sup> Kamen, 1965, 94.
- <sup>3823</sup> Cutolo, 1955, 105-83; y Bataillon, 1937, v.2, capitulo 11, secciones 2 y 4.
- <sup>3824</sup> Torre Revello, 1944, 32-33; Peña, Francisco de Cespedes, 42; y Carbia, 1914, capitulo 1.
- <sup>3825</sup> AGN, Sala IX, Escribanias Antiguas, v.21, f.77.
- <sup>3826</sup> Ullman, 1962, 300; y 1983, 109.
- <sup>3827</sup> Bruno, v.2, capitulo 8; y 3, 37-40.
- <sup>3828</sup> Bruno, 3, 19.
- <sup>3829</sup> Bruno, 3, 30.
- <sup>3830</sup> Farriss, 1968, 81; y Tibessar, 1982, 210-212.
- <sup>3831</sup> Bruno, 1, 282.
- <sup>3832</sup> Bruno, 3, 39.
- <sup>3833</sup> Weber, 1963, 76.
- <sup>3834</sup> Sobre la restitucion, ver Lohmann Villena, 1966, 21-89; y Guarda, 1973, capitulo 5, seccion 7.
- <sup>3835</sup> Zinny, 1920-21, I, 109; Torre Revello, 1944, 13; Torre Revello, 1958, 229-40; Marfany, 1940, 33 y 36; y Molina, Hernandarias, 265-71.
- <sup>3836</sup> Gonzalbo, 1983.
- <sup>3837</sup> Velasco, op. cit., 88-130.
- <sup>3838</sup> Seco Caro, 1958, y Ripodas Ardanaz, 1977.
- <sup>3839</sup> Molina, 1956, casos 9, 25, 71 y 99.
- <sup>3840</sup> Carbia, 1914, 1, 60.
- <sup>3841</sup> Una casta era una jerarquia dentro de una estratificacion racial, la cual contemplaba la proporcion de sangre blanca, ver Roscher, 1903, 19-20.
- <sup>3842</sup> Acuerdos, 2, 137.
- <sup>3843</sup> AGN, v.24, f.221.
- <sup>3844</sup> AGN, v.22, 172v.

---

<sup>3845</sup> Seed, 1980, 91.

<sup>3846</sup> Seed, 1980, 97 y 98.

<sup>3847</sup> Molina, 1956, casos 18 y 28.

<sup>3848</sup> Idem.

<sup>3849</sup> Gutierrez, 1980.

<sup>3850</sup> Molina, 1956.

<sup>3851</sup> AGN, v.27, f.186.

<sup>3852</sup> Zapata Gollan, 1969, 253.

<sup>3853</sup> Cutolo, Bibliotecas Juridicas, 144. Sobre Tomas Sanchez, SJ, ver Noonan, 1972, 31-41; y Rodriguez Molas, 1984, 38-39 y 64-66. El libro de Sanchez, en latin, tuve oportunidad de consultarlo en la seccion de libros antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin, en Madison.

<sup>3854</sup> Erasmo, 1518; y 1526.

<sup>3855</sup> Bennassar, 1975, 148.

<sup>3856</sup> Seed, 1980, 177-178.

<sup>3857</sup> Seed, 1980, 191.

<sup>3858</sup> Molina, 1956, 163-179.

<sup>3859</sup> Ibidem, caso n.12.

<sup>3860</sup> Ibidem, caso n.71.

<sup>3861</sup> Ibidem, caso n.108; y AGN, v.21, f.399.

<sup>3862</sup> Ver Guerra, 1993, 77.

<sup>3863</sup> Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de Acosta. Falleció en Lima.

<sup>3864</sup> Primo hermano del Cura de las Saladas José Francisco de Casajús; y hermano de León Martínez de Ybarra, quien estaba casado con María Ignacia de Acosta y Zamudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, I, 29). El suegro de su hermano, Don José de Acosta, era concuñado del Teniente Gobernador Nicolás Patrón y Centellas.

<sup>3865</sup> Labougle, 1930, 1-18; y Bruno, 1967, V, 153.

<sup>3866</sup> Bruno, 1967, V, 154.

<sup>3867</sup> Testimonio de José Borjes, en AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

<sup>3868</sup> Ibidem.

<sup>3869</sup> Lynch, 1967, 84.

<sup>3870</sup> ex-Obispo del Paraguay. Ver Piaggio, 1912.

<sup>3871</sup> Hijo del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Salta General Domingo de Isasmendi y Ormazábal, nacido en Marín en noviembre de 1700, Encomendero de los Molinos, y de María

---

Magdalena Díez Gómez y Castellanos, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Encomendero de los Molinos Maestre de Campo Diego Díez Gómez y Argüello y de Valeriana de Escobar Castellanos y Cabrera, sin sucesión. Su padre contrajo segundas nupcias en 1744 con Josefa Gertrudis de Echalar y Morales, nacida en Tarija, hija del Teniente Gobernador de Tarija Maestre de Campo Juan Echalar y de Bartolina Morales. Era hermano de Nicolás Severo Isasmendi, el último Gobernador-Intendente designado por el Rey de España, y cuñado de Sinforoso José Rioja, de Cayetano José Viniegra, de Francisco de Poveda Hernández, de Jacoba Gorostiaga Rioja, y de Micaela de Gordaliza y Hoyos (Calvo, II, 32-33).

<sup>3872</sup> fué designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José Agustín Álvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

<sup>3873</sup> Acevedo, 1965, 455. El chanfre constituía una de las dignidades menores, la cuarta luego del prelado, y su oficio principal el de concurrir a las cargas que el prelado y el Cabildo catedralicio habrían querido encomendarle (Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, t.16, p.1530)..

<sup>3874</sup> Acevedo, 1965, 455.

<sup>3875</sup> Lewin, 1967, 27. Los Capítulos Generales eran una suerte de convenciones periódicas, que se convocaban cada seis años, en las cuales delegados de cada provincia se encontraban para elegir un nuevo Superior General denominado Ministro General o simplemente General (Tibesar, 1955, 243).

<sup>3876</sup> Hijo de Francisco Pérez de Saravia y de Isabel de Sorarte. Fué abogado del famoso comerciante Tomás Antonio Romero. Para la biografía de Pérez de Saravia ver Cutolo, V, 440; Mariluz Urquijo, 1958, 132-133; y Fuenzalida Grandón, 1972, 633.

<sup>3877</sup> Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-VI-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

<sup>3878</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.39, Exp.5, fs.32v.

<sup>3879</sup> Había pasado a América en la familia del Obispo de Arequipa Fr. Miguel Pamplona, y en su tránsito por Montevideo lo recogió el Obispo de Asunción Fr. Luis de Velasco (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.26, Exp.772, fs.73).

<sup>3880</sup> ver Mora Mérida, 1976, 123-129.

<sup>3881</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.25 y 40.

<sup>3882</sup> Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-IV-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

<sup>3883</sup> *Ibidem*.

<sup>3884</sup> Ganster, 1993, 157.

<sup>3885</sup> Lynch, 1967, 82.

<sup>3886</sup> Por cuanto en los tres volúmenes del Catálogo de la Real Audiencia de Santiago (Santiago de Chile: Imprenta Barcelona) no figura ningún litigio referente a este singular caso sospecho que debe haber algún expediente en el Archivo de la Audiencia de Charcas.

<sup>3887</sup> Hermano de Fr. José Piñero, ambos hijos del Capitán Juan Eusebio Piñero de Torres y de María Rosa Pacheco de Mendoza, y nietos de Margarita Villarroel, fallecida en Colcha, Santiago del Estero (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4). Juan Vicente era casado con María Baigorri Garay, viuda del Sargento Mayor Bernardo Vélez de Herrera, hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Eran padres de Juan José Piñero, casado con Vicenta Molina, hija del Cap. Vicente Molina, vecino del Río Cuarto, y de Vicenta Montiel, nieta paterna del Cap. Luis de Molina Navarrete y Tejeda, y de Isabel de Garay Peralta y Tejeda

---

(Lazcano Colodrero, 1968, II, 160; III, 386; Buscá-Sust, 1981, 68). Juan Vicente Piñero fué procesado en 1765 por amancebamiento, proceso por el cual fué expulsado del Cabildo (AHC, Crímen, Leg.19, Exp.25). También usufructuó Piñero largamente de los fondos financieros (capellanías y obras pías) de la Orden de la Merced, al extremo que en 1770 fué ejecutado por incumplimiento en el pago de los réditos (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4).

<sup>3888</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, y marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero, y primo de Juan José Campero (Acevedo, 1969, 14; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15). A juicio de Acevedo (1969), Campero utilizó la Expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus anteriores manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

<sup>3889</sup> Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Crímen, 1765, Leg.19, Exp.25.

<sup>3890</sup> Hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de José y Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3891</sup> Ver Abad y Queipo, 1963, 182-183; Comadrán Ruiz, 1971; y Arvizu, 1986, 521-541.

<sup>3892</sup> La cual se hallaba fuertemente ligada al tráfico de mulas criadas en el litoral rioplatense.

<sup>3893</sup> Acevedo, 1969, 17. Ofreciéndose en la década del 60 el capitaneazgo de los Mercedarios, su Vicario General, "...por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente [Palacios] sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese al otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores, a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>3894</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3895</sup> Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

<sup>3896</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3897</sup> El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962, 186).

<sup>3898</sup> Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

<sup>3899</sup> Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

<sup>3900</sup> Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar mulas en

---

Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

<sup>3901</sup> Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

<sup>3902</sup> Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

<sup>3903</sup> Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

<sup>3904</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>3905</sup> plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

<sup>3906</sup> El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

<sup>3907</sup> Haslip-Viera, 1993, 351.

<sup>3908</sup> Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

<sup>3909</sup> La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

<sup>3910</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

<sup>3911</sup> Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3912</sup> Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los

---

Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>3913</sup> Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crimen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estandisla de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiola, un juicio por injurias (AHC, Crimen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

<sup>3914</sup> AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

<sup>3915</sup> Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios que anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador \$4.000; y éste, así por esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>3916</sup> Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiola y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

<sup>3917</sup> Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

---

<sup>3918</sup> Enfrentada a la Casa de los Allende.

<sup>3919</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3920</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>3921</sup> *Ibidem*.

<sup>3922</sup> *Ibidem*.

<sup>3923</sup> Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

<sup>3924</sup> Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>3925</sup> Recién en 1809 Cuyo fué agregado a la provincia dominicana de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay (Verdaguer, I, 51).

<sup>3926</sup> Fr. Manuel Flores, Lector Pretérito, Fr. Juan Castro, Fr. Manuel Barrionuevo, Fr. Pedro Fernández, Lector de Vísperas, Fr. Remigio Albarracín, Lector Pretérito, Fr. Antonio Ximénez, Lector de Artes y Maestro de Novicios, Fr. Rafael Balenzuela, y Fr. Dionicio Rodríguez. Barrionuevo era nacido en San Juan en 1754, hijo de Domingo Barrionuevo y de Ana Oro, Teniente Cura en San Juan desde 1788 a 1797, y Prior del Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de San Luis (Verdaguer, I, 590). Albarracín era nacido en San Juan en 1756, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de Josefa Irrazábal, hermano de Fr. José Francisco Albarracín, sobrino de Fr. Miguel Albarracín y Balmaceda y de Fr. José Justo Albarracín y Domínguez, y primo segundo del primer Obispo de Cuyo Fr. Justo Santa María de Oro (Verdaguer, I, 592). Flores nació en San Juan en 1757, hijo de Domingo Fernández y de María Antonia Hurtado (Verdaguer, I, 592). Fernández nació en San Juan en 1768, fué Prior en 1810, y fué quien obtuvo la vuelta al claustro de los dominicos secularizados en tiempos del Gobernador Salvador María del Carril (Verdaguer, I, 607; y Saldaña Retamar, 1920, 99). Y Rodríguez, nació en San Juan en 1779, fué Sub-Prior del Convento de 1811 a 1815 y Prior de 1815 a 1818 (Verdaguer, I, 639).

<sup>3927</sup> En efecto, \$600 fueron redimidos por Basilio Pastoriza, que recaían sobre la hacienda de Don Remigio Albarracín; \$600 que redimió Felipe Mallea; \$977 que redimió Juan Manuel de Castro; \$600 que redimió el albacea de Modesto Molina; \$100 que dió Santiago Jofré cuando entregó perdida la viña sobre que recaían \$500 de principal; \$253 en que fueron vendidas las tierras a Don Leandro Castro; \$700 en que fueron vendidas a Xavier Garramuño la viña y molinos del finado Guevara, que las había recibido en \$4.000; el precio ignorado en que fueron vendidas a Estanislao Zavalla las tierras que eran de los Moyano en capellanía; \$600 en que fueron vendidas las tierras y viña de Don Mateo Castro; el precio ignorado en que fueron vendidas las tierras que fueron viña, en que se fundó la Capellanía del Sr. de la Columna, en la pampa de San Pantaleón; y los \$500 en que se vendió a Juan Manuel Castro la Chacarilla (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11).

<sup>3928</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.45, Exp.381; y Leg.48, Exp.1384 (citado por Bruno, VII, 210).

<sup>3929</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

<sup>3930</sup> *Ibidem*.

<sup>3931</sup> Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Asención Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

<sup>3932</sup> Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de María Antonia Espinosa de los Monteros, hija de Francisco Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V,

---

336-337).

<sup>3933</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

<sup>3934</sup> Bustos, 1901, 127-128; y Aznar, 1935, 62, citados en Bruno, 1967, VI, 515. También en Lynch, 1967, 83.

<sup>3935</sup> Clausurados los establecimientos jesuíticos, el mismo Furlong (1960) reconoce por boca de Pemán (1944) que

"...vinieron sin selección, tropeles de mediocres profesores al país [lo cual] dió un un impulso enorme a la difusión e influencia de lo que se ha llamado luego el criollismo, o sea, la difusa conciencia de solidaridad diferencial --raíz de independencia-- de los naturales del país" (Furlong, 1952, 179).

Sin embargo, a la luz de los argumentos expuestos por Cheroni (1983), podríamos concluir en un juicio totalmente opuesto, es decir, que los Franciscanos garantizaron una educación más abierta y comprometida con el avance del conocimiento científico, desde el momento que incorporaron seglares en sus aulas.

<sup>3936</sup> Bruno, 1967, VI, 522; y Chamosa, 1991.

<sup>3937</sup> Oriental, hijo de Salvador Súlivan y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

<sup>3938</sup> porteño, hijo de Antonio Cabral y Ana María Hernández; y marido de Martina Gutiérrez de la Bárcena, hija de Bernardo Gutiérrez de la Bárcena y de Gerónima de Arauz; y suegro de José Gregorio Belgrano (Fernández de Burzaco, II, 20).

<sup>3939</sup> Partidario de la familia Allende. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>3940</sup> Hijo del Alcalde Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa de Urtubey y Paz de Figueroa, cuñado del Alcalde Provincial José Martínez de Candia, y del R.P. Bernabé Echenique, y marido de Marquesa Antonia de los Reyes, viuda de Felipe Crespo.

<sup>3941</sup> Ver Triano, 1984, 125-154.

<sup>3942</sup> Pueyrredón, 1953, 28-31; y Bruno, 1967, VI, 530-531.

<sup>3943</sup> Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (Lazcano, I, 194). Era hermano del comerciante y Alcalde Sargento Mayor Ambrosio Funes. Funes habría incurrido en el delito de simonía, al gestionar para sí con dinero el Obispado de Córdoba (Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-30; y 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-03; y 61, 19-23).

<sup>3944</sup> Fué Comisario de la Santa Cruzada y luego Arcediano de la Catedral de Córdoba, falleció en 1792, hijo de Don Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León; sobrina de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas existente en Córdoba; cuñado de Don José de Allende y Losa; y tío político del Teniente Coronel Félix Mestre. Existe un inventario de sus libros y papeles (AHC, Escribanía N.4, Leg.5, Exp. 21).

---

<sup>3945</sup> Bruno, 1967, VI, 517.

<sup>3946</sup> Bruno, 1967, VI, 533.

<sup>3947</sup> Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (Lazcano Colodrero, I, 194). Casó con María Ignacia de Allende Vicentelo, hija del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrina carnal de José y Santiago de Allende y Losa, hermana del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y cuñada de Francisco Javier de Usandivaras, de Antonio de la Quintana Sebreros, y de Nicolás Cabrera Zeballos. Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (Allende Navarro, 1964, 104). Funes tomó partido por su sobrino político Pedro Zenavilla, marido de una hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de su prima María Mercedes Funes, en contra de su cuñado el Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.103).

<sup>3948</sup> Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Ascensión Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

<sup>3949</sup> Amén del Comandante General de Armas Francisco del Signo, informan al Virrey los siguientes vecinos: Agustín Igarzábal, Juan Rolón, Juan Prado, Antonio Fragueiro, Pedro Malde, Francisco Antonio González, Francisco Peña, Francisco Alvarez, Lorenzo Antonio Maza, José Eguilúz, Fermín Sierra Pico, Manuel Azúnsolo, Francisco Bulnes, Manuel López y Gregorio Texerina (Garro, 1882, 191, 194, 205-211; Bustos, 1901-10, III, capítulos IV-XIII; y Bruno, 1967, VI, 531-533).

<sup>3950</sup> Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiola, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 19-V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3).

<sup>3951</sup> Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allende y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y Zúñiga, de José Cipriano de Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas (Calvo, I, 36; y III, 56).

<sup>3952</sup> Tonda, 1981, 43. Hijo de Francisco Antonio Díaz, Español, y de María del Carmen Albornoz y Carranza, marido de Jenuaria Allende y Mendiola; y hermano de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203).

<sup>3953</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13.

<sup>3954</sup> El Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León fué célebre por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Es de destacar la honestidad con que este clérigo admitió su estado por cuanto apenas las circunstancias se lo permitieron mandó llamar a su amante y sus hijos que residían expatriados en Buenos Aires.

<sup>3955</sup> Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989, 357). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta, dueña del Ingenio Chaca, en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí

---

Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y con cuñado del Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de Alvarado y Toledo (Morales Guinazú, 1936, 104).

<sup>3956</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

<sup>3957</sup> Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziel y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

<sup>3958</sup> este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 227; y Francovich, 1948, 61-71.

<sup>3959</sup> Muñoz Cabrera, 1867, 17.

<sup>3960</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

<sup>3961</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en los expedientes 2, 4, 6, y 10 siguen los entretelones de este conflicto; Ripodas Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185.

<sup>3962</sup> Bruno, VII, 179.

<sup>3963</sup> Buechler, 1989, 265.

<sup>3964</sup> Halperín Donghi, 1961, 121.

<sup>3965</sup> consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior (Silva, 1968, 1030).

<sup>3966</sup> Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que se inhíba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668).

<sup>3967</sup> En 1752 el Comisario del Tribunal del Santo Oficio libraba exhortos para que a los Familiares se les guarde el privilegio de que gozan en las elecciones de alcaldes ordinarios (Acuerdos, III Serie, I, 271-279). Cincuenta años más tarde, en 1804, el Rey dictó una Real Cédula que obligó a los Familiares a aceptar los cargos concejiles (Acuerdos, IV Serie, t.I, 533). Para la jerarquización interna del Tribunal del Santo Oficio en América, ver Castañeda y Hernández, 1989, capítulos I y II. Y en 1793 Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, solicitaba que como Contador de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba, en sustitución de Miguel Antonio del Corro, se le guardaran todos los fueros que le correspondían (AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897).

<sup>3968</sup> Ver Tibesar (1955), González Echenique (1962), Palacio y Brunet (1977), y Lavallé (1979).

<sup>3969</sup> El Obispo Sarricolea informaba a mediados del siglo XVIII que se le estaba debiendo al Convento de Santa Catalina \$121.000, y al Convento de Monjas Teresas \$36.820 (Larrouy, 1927, 24; y Punta 1988, 2).

<sup>3970</sup> Castro, 1948, 537-560.

<sup>3971</sup> Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

<sup>3972</sup> El fenómeno eleccionario en los Cabildos estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la

elección propiamente dicha y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, según el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas, debía ser celebrado en la víspera de cada elección (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores y los Oidores. El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era, según Pedro Vicente Cañete, para excluir candidatos objetables, mediante "...excepciones verbales que no se asientan; para evitar difamaciones" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12); y según Mariano Moreno, para "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la elección debía ser, según Cañete, por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

<sup>3973</sup> Alamán acusó a los criollos de México de ser culpables de la guerra de castas debido al odio racial que les infundieron a los indios en la guerra de independencia (González Navarro, 1985, 42). Sobre Abad y Queipo, ver Fisher (1955). Para más información ver, Villoro, 1950, 171; Stein, 1970, 113-114; Durand Florez, 1974, 101-107; y Romero, 1976, 79.

<sup>3974</sup> para la utilización de esta categoría ver Habermas, 1989, 41, 49-50, y 56; Ankersmit, 1989, 148; y Fracchia, 1991, 158-159 y 161. Privilegiar uno de los polos de una oposición es esencializar las identidades sociales y ocultar su heterogeneidad (Poole y Rénique, 1992, 75).

<sup>3975</sup> para la utilización de esta categoría ver Foucault, 1992, 82.

<sup>3976</sup> Mitre, 1971, III, capítulo XXIX, 4.

<sup>3977</sup> Mitre, 1971, III, capítulo XXIX, 4.

<sup>3978</sup> Ibídem. Posteriormente, Mitre (1887) destacó el argumento que Paz Soldán (1868-74) había tomado de la carta que Félix Durán le había escrito a Tomás Guido acerca de la impotencia del Perú para colaborar con la redención Americana. A diferencia de Chile y del Río de la Plata, donde según Mitre, fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana (1854-58), el mestizaje había engendrado una raza criolla; en el Perú, Durán atribuía la necesidad de una fuerza extraña para su redención a "...la abundancia de castas índica y etiópica y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes entre los americanos blancos y los indios" (M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz Soldán, 1868-74, I, 27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389). (Pese a reiterados esfuerzos no he logrado aún saber quien es Durán, pues el Diccionario Histórico del Perú, de Mendiburu, lo ignora; y el de Milla Batres es inhallable en Buenos Aires).

<sup>3979</sup> ver Castro, 1948, 621-633; Konetzke, 1951, 329-357; y Lira Montt, 1978, 131-152.

---

<sup>3980</sup> Maeztu, 1942, 42. Según Weckman, la hidalguía significaba limpieza de sangre, es decir la descendencia exclusiva de personas que eran al mismo tiempo cristianos viejos y hombres libres (Weckman, 1984, II, 578).

<sup>3981</sup> La nobleza de sangre consistía en "...cierto esplendor adquirido por un primero, a quien hizo venerable y conocida [dicha nobleza] sobre el ser común de los demás hombres alguna singular excelencia de virtud eroycia para que estimulado de ella procure con generosos hechos merecer nuevos honores, porque no hay que más obligue al sucesor a vivir y obrar bien que la buena opinión de sus ascendientes y ninguna más torpe y vergonzosa que aceptar el Patronímico y renunciar la virtud" (Juicio de disenso entablado por el abogado de Nicolás de Peñaloza y Bazán contra Francisco Vera y Bustamante [AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.25, Exp.5]).

<sup>3982</sup> El hugonote Mayerne (1611) intentó crear un concepto burgués de la noblesse, que permitiera a la burguesía reemplazar a la antigua clase dominante. Sólo el mercader, sostenía Mayerne, merece la nobleza, "...pues la demuestra con su éxito material; además, beneficia al reino con su comercio, que enriquece al país y al mismo tiempo le da a él mismo un conocimiento de los asuntos públicos como no proporciona ninguna otra profesión. Por lo tanto, la de las armas y la guerra es una profesión innoble; lo noble es el comercio, las finanzas y la agricultura" (Kamen, 1977, 237). En suma, para Kamen (1977), si Mayerne quería derrocar una nobleza, "...era sólo para sustituirla por otra" (Ibídem).

<sup>3983</sup> sólo personal y no trascendía a los hijos por herencia. Ver Maeztu, 1942, 42.

<sup>3984</sup> Según los moralistas "...la nobleza de nacimiento no prevalece contra la nobleza de corazón, pues hay que estimar más a un mozo de cuerda que fuese hombre honrado que a un caballero que viviese sin virtud" (Hazard, 1958, 336).

<sup>3985</sup> Girard, 1985, 108.

<sup>3986</sup> Elizondo, 1779, III.

<sup>3987</sup> Schwartz, 1979, 12; Céspedes del Castillo, 1985, 289; y Ortiz de la Tabla Ducasse, 1993, 41-46.

<sup>3988</sup> Chance y Taylor (1977, 1979), Valdés (1978), Seed (1982), Seed y Rust (1983) y Wu (1984), citados por Anderson, 1988, 211; y Stoler, 1989, 136.

<sup>3989</sup> Roig, 1982, 26.

<sup>3990</sup> Facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a otros compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>3991</sup> Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>3992</sup> Smith, 1992, 513.

<sup>3993</sup> Para este aspecto consultar Endrek, 1966, capítulo IV.

<sup>3994</sup> Para una visión pro-realista de las castas en la Guerra de independencia de Venezuela, ver King, 1953.

<sup>3995</sup> es aquel que puede probar posesión de hijosdalgo por el espacio de sólo veinte años, válido sólo para el lugar donde vive pues en saliendo de él ya no lo es (Escriche, 1863, 1337).

<sup>3996</sup> Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, Cuadros 4 de Pilar, 5 de Areco y 9 de Magdalena, pp.

---

129, 75 y 45; Di Stefano, 1991; y Gelman, 1992, 54. Ver asimismo las opiniones del Dr. Ezquerreneau en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.228, Exp.16, fs.26-34; y Leg.231, Exp.12, fs.162-164v.). Para poder ser llamado Don, el escribano Juan José Rocha, mulato, adquirió en 1797 en Buenos Aires una gracias al sacar (Socolow, 1987, 106).

<sup>3997</sup> Lira Montt, 1974, citado por Ruiz Moreno, 1989, 242, nota 18. Para el caso de México ver Langue (1987).

<sup>3998</sup> Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina Domínguez; y marido de Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín Prudencio Pérez y de María Josefa Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia (Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los Mercaderes de Plata del Potosí (Tandeter, 1992, 155).

<sup>3999</sup> AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12.

<sup>4000</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.22, fs.40.

<sup>4001</sup> Don Nicolás estaba casado con Melchora Agüero y Bazán, y había sido Alcalde del Partido de Los Llanos, y dueño tanto de una estancia en Atilas y otra en Malanzán como de una acentuada conciencia de su alcurnia o estirpe, al extremo de provocar en la década del 70 célebres litigios en perjuicio de paisanos y de parientes directos suyos, tales como el Alcalde de Hermandad Francisco de Vera y Bustamante, José Antonio Medina, y su propio hijo Juan Estéban Peñaloza y la que luego fuera su nuera Ursula Riveros. El derecho de los padres a seleccionar el marido de sus hijas era como hemos dicho más que nada un mecanismo de defensa contra el descenso social que el matrimonio con criollos bastardos y étnicamente impuros significaba. Aquellos miembros de la élite que no se resignaban a una desigualdad étnica y social y se negaban a entregar sus hijas a un convento, se veían a veces con la ingrata sorpresa de tener que afrontar las consecuencias de una relación espuria. Habiendo seguido pleito con las familias de los Riveros, Avilés, y demás poseedores de los terrenos de Malanzán por más de cinco años, Nicolás Peñalosa le refiere al Gobernador-Intendente de Córdoba que "...se decidió al fin a mi favor por mi notoria justicia,...por lo que se me mandó dar con dictámen de Letrado la posesión de los terrenos disputados, la que tomé judicialmente con resistencia de algunos de mis contrarios en particular de los detentadores del Portezuelo y Aguita" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.17 [Sala IX, 6-1-5]).

<sup>4002</sup> Lazcano, 1969, 483.

<sup>4003</sup> Serrano Redonnet, 1979, 217.

<sup>4004</sup> Era una época en la que la ausencia del consentimiento paterno significaba la pérdida de los derechos hereditarios (Ots, 1934, 121).

<sup>4005</sup> Cutolo, 1978.

<sup>4006</sup> sobre el concepto de honor, ver Berger, 1983.

<sup>4007</sup> Vial Correa, 1965, 22.

<sup>4008</sup> Estado que manifiesta el número de personas que se hallan en dicho Obispado con expresión de los nombres de los Curatos donde residen, sus clases, estados y castas, según los Padrones que han hecho sus respectivos Curas el año pasado de 1778 en virtud de orden que para ello se les comunicó a consecuencia de la de S.M. de 10 de Noviembre de 1776 (Larrouy, 1927).

<sup>4009</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

<sup>4010</sup> *Ibidem*.

<sup>4011</sup> también conocido por Anicio Manlio Severino, autor de *De Consolatione philosophiae* o *De*

---

consolatione Theologiae (Espasa Calpe, Enciclopedia Universal Ilustrada, v.8, p.1285-1286).

<sup>4012</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

<sup>4013</sup> Los considerandos del despacho por el cual se ordena el fusilamiento del Coronel Santiago Alexo de Allende advierten que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes" (Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1). Sobre la virtud en la visión renacentista de Maquiavelo, ver [Azevedo Júnior](#), 2006.

<sup>4014</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

<sup>4015</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

<sup>4016</sup> la pudo haber obtenido de la lectura de El Principe Cristiano de Erasmo, de "El Banquete" de la Divina Comedia, o de las obras de Buonaccorso da Montemagna, Poggio Bracciolini y Giovanni Nenna, repetidas por Alberti, Landino o Platina, existentes para entonces sólo en la biblioteca de algún clérigo (Mitchell, 1938, 176; Charlton, 1965, 84; Davis, 1967, 434; y Holmes, 1973, 128, citados por Skinner, 1987, I, 66, 103-104, y 263-264).

<sup>4017</sup> Pocock, 1975, citado por Wood, 1993, 100; y Skinner, 1987, I, 64.

<sup>4018</sup> Serrano Redonnet, 1979, 217.

<sup>4019</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

<sup>4020</sup> marido de María Josefa Cabanillas, hija de Juan C. Cabanillas y de Luisa Arias Velásquez, nieta de Lauro Cabanillas y Cevallos, natural de Córdoba, y de María Francisca de Castellanos y Martínez de Iriarte (Cornejo, 1937, 487). María Josefa era sobrina de Micaela Cabanillas, casada y divorciada de José de la Casanueva (AGN, División Colonia, Comunicaciones y Resoluciones Reales, Libro 6, fs.250). Don Francisco Anse de Graña otorga testamento en 1786 (Archivo Histórico de Salta, Escribanías, año 1786, fs.47).

<sup>4021</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 133, Exp. 17, fs.9.

<sup>4022</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.167, Exp.1, fs.34.

<sup>4023</sup> Pugliese, 1989, 437.

<sup>4024</sup> Domingo González en 1764, Francisco Xavier de la Quintana en 1769, Fr. Francisco Altolaquirre en 1770, Antonio Basilio de Aldao en 1772, Agustín Fernández en 1776, José Antonio de Oro en 1780, Manuel del Cerro Sáenz en 1787, Miguel González de Noriega en 1788, Ramón de Oromí y Martelles en 1786 y Miguel Sáenz en 1788 (Acuerdos, 3a Serie, II, 539, 544 y 582; IV, 101, 200, 203 y 342; V, 722; VI, 409; y VIII, 113, 251, 357 y 430).

<sup>4025</sup> Acuerdos, III Serie, II, 242.

<sup>4026</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.57, Exp.8.

<sup>4027</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.2, fs.14v.

<sup>4028</sup> AGN, Tribunales, Leg. F-5, Exp.13.

<sup>4029</sup> Pugliese, 1989, 438.

<sup>4030</sup> Hijo del General Amador Fernández de Agüero y de Petrona Cabral de Ayala; marido de María Ignacia Narbarte, hija de Juan Ignacio Narbarte y de Josefa González; hermano del Pbro. Juan Cayetano Fernández de Agüero; y cuñado de los Capitanes Andrés de Avila y Miguel Troncoso (Trelles, 1888, 37-49; y FB, I, 39; III,

---

33; y V, 11).

<sup>4031</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.57, Exp.39, fs.20.

<sup>4032</sup> *Ibídem*.

<sup>4033</sup> La personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero (1976), o más bien de la mujer victimaria de la que nos habla Vicuña Mackenna (1877), se nos reveló primero en ocasión de la crisis desatada en Córdoba en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a una carta del R.P. Pedro Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo Histórico de Córdoba, donde el primero le relata al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José Martínez, Doña Clara Echenique,

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta gobierna, a su marido, y según pude entender, y supe después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que admitiese composición, y de que fuese de corazón tan apocado, que siendo el ofendido conviniese, en irse a humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa como a pedirle perdón. A la tarde conocí luego que el corazón del Alcalde estaba mudado, y aunque salió conmigo de la cárcel, luego, que estube en la calle me dixo: Como quiere Padre, que vaya a casa de el Teniente de Rey; vamos antes al aposento de V.R. todos, y allá, haremos las paces: mire, añadió mi Padre, que mi mujer sabiendo, que he hecho esta vajeza, me ha de cerrar las puertas de Casa a la vuelta, de hay no lo pude sacar, y por no perder lo que tenía trabajado, volví con esta novedad a Casa del Teniente de Rey, donde estaban esperando" (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766 [AHC, Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.46-48].

Como las negociaciones duraron varias semanas más, el R.P. Andreu interpuso un nuevo sujeto de mediador, el cual le aseguraba

"...que por Martínez no habría habido dificultad, pero que su mujer le dixo, separa tu caudal, que fué corto, los treinta y cinco mil pesos, que traxe en dote, los he de gastar en esta causa, porque el agravio no se ha hecho a tí sino a mí, y a toda mi parentela" (*Ibídem*).

En 1785, en Buenos Aires, solicitaba al Alcalde Juan Antonio de Lezica, que libertara a una criada suya llamada Francisca, por entender le correspondía también a ella el fuero militar (AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.35). Ya anciana, y todavía viviendo en Buenos Aires, debido seguramente al aislamiento social que sufriera en Córdoba con motivo del desplazamiento de la casa de los Echenique por parte de la más dinámica casa de los Allende, le inició a su hijo Julián Martínez, cuando se casó en 1794 con Juana Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de Potosí, un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

<sup>4034</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.102, Exp.12.

<sup>4035</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.20, Exp.7.

<sup>4036</sup> Era probablemente hijo del Capitán Antonio Suárez de Cabrera, dueño de la estancia de Piscoguasi, fallecido en 1738, y de Josefa Gigena, y nieto de Felipe Suárez de Cabrera y de Josefa de Sotomayor (LC, III, 414). En 1797 testó en Buenos Aires Juana Inés Suárez y Xixena, hija de José Antonio Suarez y de Josefa Xixena, y casado con Pedro de Aguilera, natural de la ciudad de Lucena (AGN, Protocolos, Reg.3, 1797, fs.303v.).

<sup>4037</sup> Marido de Doña Feliciano Castellanos, hija de Pedro Castellanos Zerda, propietario de las haciendas La Cámara, La Hoyada, y Barraza, adquiridas a las Temporalidades en 1786, y de María Magdalena Plazaola de la Zerda y Arcos; padre del famoso constitucionalista Facundo de Zuviría, de Feliciano de Zuviría, mujer del General José Ignacio Gorriti, (a) "Pachi", y de Manuela Vicenta de Zuviría, mujer de Nicolás Arias Rengel Castellanos; y abuelo de los juristas liberales José María, Ramón, Julio, y Fenelón de Zuviría Lezama.

---

<sup>4038</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Z-4, Exp. 1.

<sup>4039</sup> Nacido en Cádiz, y marido de Isabel Rosa Delgado y Viñales (FB, IV, 413; y JR, 1989, ítem 4082).

<sup>4040</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Z-4, Exp. 1.

<sup>4041</sup> Ver Apéndice B-II.

<sup>4042</sup> Arcondo, 1992, 224.

<sup>4043</sup> Hijo de Bernardo Casajús y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús. Cuando su madre enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús, hija de Sebastián Casajús y María Carvalllo. Era cuñado de José Ignacio de Beláustegui, del Alcalde José Sánchez Moreno, de Manuel González de Horduña, y de Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis Cabral y Soto.

<sup>4044</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1.

<sup>4045</sup> *Ibidem*, fs. 9v.

<sup>4046</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4.

<sup>4047</sup> Alcalde de Mendoza en numerosas oportunidades.

<sup>4048</sup> Hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte.

<sup>4049</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp. 8, fs.16v.

<sup>4050</sup> *Ibidem*.

<sup>4051</sup> *Ibidem*.

<sup>4052</sup> *Ibidem*.

<sup>4053</sup> *Ibidem*.

<sup>4054</sup> Hijo del Administrador de la Renta de Tabaco de Tucumán Coronel Manuel Estéban de Castro y de Dominga Carreño Bazán, hija a su vez del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera. Era sobrino de Francisca Carreño Bazán, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68), y yerno del comerciante Juan de Lahoraia (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366). Era también pariente político por vía de su mujer con el Comandante de Armas José Xavier Jofré (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 115, Exp. 19, fs. 197). En los autos sobre la posesión del empleo de Teniente Ministro de la Real Hacienda que a nombre de Fernando de la Rosa iniciara en 1793 Juan de Almeida contra Juan Manuel de Castro Carreño, el letrado patrocinante Juan José Castelli aclaraba "primero, que las guías de aguardiente para la jurisdicción eran en tanto número, que excedían su consumo; segundo, que ni aún la quincuagésima parte de los [aguardientes] que entraban a Córdoba constaban de guía; y lo tercero que no se ocultaba a Castro así el perjuicio inferido al ramo de Sisa por este fraude, como también que para cometerlo se balian del advitrio de sacar con nombre de vino las cargas de aguardiente. Aora pues, si al tiempo de registrar los caldos que se extraían le era tan fácil advertir este fraude ¿cómo dió lugar a que su continuación causase el grave perjuicio de no equivaler los aguardientes que salían para Córdoba con guía, a la quincuagésima parte de los que en ella y su jurisdicción se consumen al año? No es esto justificar las aserciones juradas de los dependientes del resguardo, que aseguran haver advertido a Castro de semejante fraude, y que no puso remedio por el motivo que queda expuesto? Que mucho...que los que disfrutaban de este delincente disimulo clamen con furor que Castro sea repuesto como el mismo lo asegura? El interés, pero un interés con daño de un tercero tan privilegiado como es el Ramo de Cisa, es el que a grangeado a Castro amigos y parciales que en el furor de ver estancada la fuente de sus utilidades claman que vuelva a correr por su cauce (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.379).

---

<sup>4055</sup> llamado así por su antigua afección a los Jesuitas expulsos.

<sup>4056</sup> Juan Miguel era hijo de Bernardino Oro y de Josefa Cossio y Therán, casado con María Elena Albarracín, fué padre del comerciante José Antonio Oro, agente comercial de Martín Alzaga, y padre del prócer Fr. Justo Santa María de Oro, quien a su vez era tío de Domingo Faustino Sarmiento (Cutolo, V, 190; Guerrero, 1958; y Wildner-Fox, 1966). Juan Miguel también era primo de Clara de la Rosa y Oro, mujer de Pedro Carril, y tío de José Antonio Godoy Oro, marido de Francisca Regis de la Rosa, designado por el Real Consulado diputado en la ciudad de San Juan para el bienio de 1804-06, autor de un célebre Informe acerca de la realidad económica sanjuanina (Tjarks, 1957).

<sup>4057</sup> Hijo del Alcalde Bartolomé Tello y de Clemencia Lagorio. Su padre había sido Alcalde de Aguas varios años, y de la Santa Hermandad de dos para tres años y después de 1764 la Real Audiencia había depositado en él la jurisdicción ordinaria "...en cuja administración continuó 6 para 7 años que se mantuvo suspenso el Cabildo" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp. 11, fs.125v.). De su madre los cabildantes de San Juan denunciaron en 1794 que era casada en segundas nupcias con Lucas Benegas "...de calidad conocida por tan inferior que no hay bileza con quien no esté mezclada, y de aquí es que con un padraastro de esta naturaleza al lado no habrá compatriota que se glorie de tenerlo por candidato" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp.11, fs.34). Casó con María del Transito Videla, hija de José de Videla Barreda y de María del Carmen Guardiola y Navarro, y prima hermana del que fuera Gobernador de San Juan Valentín de Videla y Lima, asesinado en 1872 (Calvo, IV, 353). En tiempos de Rosas, fiel a su ideario liberal, tuvo que emigrar, radicándose en Los Andes, Chile. Fué padre del Diputado Nacional Estanislao L. Tello (Guerrero, 1965, 87-95).

<sup>4058</sup> Saguier, 1990b.

<sup>4059</sup> Hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan Vázquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (Calvo, IV, 327). Era hermano de Fernando de la Rosa y de Clara de la Rosa de Del Carril, y tío del Teniente Gobernador Jose Ignacio de la Rosa, del Gobernador Salvador María del Carril, y del mártir Antonino Aberastain (Cutolo, VI, 409; I, 3).

<sup>4060</sup> Probablemente hijo o nieto de Pedro Robledo y de María de Villafañe y Guzmán, desposados en 1711. Don Pedro Robledo era a su vez hijo de Juan Robledo y de María Sánchez de Loria (Serrano Redonnet, 1943, 67).

<sup>4061</sup> Hijo del Maestre de Campo José de Riveros, natural de Lisboa, y de María Josefa de Echegaray; marido de Juana Josefa Sarmiento, hija del Maestre de Campo Pedro Sarmiento y de María Gracia Alvarez Cortínez, nieta del Maestre de Campo Ignacio Sarmiento y de Isabel Aragonés, y hermana de Pedro José, Rafael Antonio, y Mateo Sarmiento (Testamento de Pedro Sarmiento; y cuñado de Santiago Jofré. [AGN, Tribunales, Leg.99, Exp.6, fs.31]; y Silva Argañaraz, 1991). La filiación que al respecto dá Calvo esta completamente errada (Calvo, II, 303). En los autos contra la Testamentaria de Pedro Sarmiento, marido de María Gracia Alvarez Cortínez, José Clemente Riveros declaraba en 1790 que al ser los contadores Juan José Sánchez y José Ignacio Maradona elegidos por el Alcalde Antonio Aberastain, y contar éste con "...vínculos de parentesco de consanguinidad en tercero grado con mis cuñados", y habiendo casado sus sobrinas carnales con dos de sus cuñados "...apadrinándolos en el matrimonio durante el tiempo de la diferencia y litigio", era posible que "...fuesen a propósito para destruir mis cuentas sin oposición ni contradicción, sirviendo en esto a los suyos" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 165, Exp.15).

<sup>4062</sup> El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor y Maestre de Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré, y se desposó en 1787 con Clara de la Rosa y Torres, hermana de Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de Antonino Aberastain. Fue padre de Salvador María del Carril (Carte, 1958).

<sup>4063</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp.11, fs.20v.

<sup>4064</sup> *Ibidem*, fs.33v.

<sup>4065</sup> *Ibidem*, fs.33v.

<sup>4066</sup> *Ibidem*, fs. 34.

---

<sup>4067</sup> *Ibíd.*, fs.34.

<sup>4068</sup> Oro era casado con María Elena Albarracín, y fueron padres del prócer de la Independencia Fr. Justo Santa María de Oro (Cutolo, V, 190).

<sup>4069</sup> Graduado en Chuquisaca en 1784, tomó los hábitos luego de enviudar, para ser Provisor y Gobernador del Episcopado, y en tiempos de Rivadavia cargar sobre sus hombros la responsabilidad de la Reforma Religiosa (Cutolo, 1963, 30-31).

<sup>4070</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 133, Exp. 11, fs. 125v.

<sup>4071</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp. 11, fs.125v.

<sup>4072</sup> *Ibíd.*, fs.126.

<sup>4073</sup> *Ibíd.*

<sup>4074</sup> *Ibíd.*, fs. 127.

<sup>4075</sup> *Ibíd.*

<sup>4076</sup> *Ibíd.*, fs. 127v.

<sup>4077</sup> Era hijo de Francisco Fernández de Maradona y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y se casó con Paula Echegaray Cano (Cutolo, III, 60).

<sup>4078</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp. 11, fs. 134v.

<sup>4079</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp.11, fs.27v.

<sup>4080</sup> Hija de José de Videla y Barreda y de María del Carmen Guardiola y Navarro, prima hermana del que fuera Gobernador de San Juan Valentín de Videla y Lima, asesinado en 1872 (Calvo, IV, 353).

<sup>4081</sup> Fué padre de quien fuera en 1872 el Diputado Nacional Estanislao Tello Videla.

<sup>4082</sup> hijo de Bernardino Villafañe Almonacid y de Josefa Sánchez de Loria, y marido en primeras nupcias de Faustina Dávila y Almonacid, y en segundas nupcias de María del Moral; y cuñado de José Carreño Bazán.

<sup>4083</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247v.

<sup>4084</sup> Existió un Nicolás Bazán, natural de La Rioja, que contrajo matrimonio con Ana de San Martín, vecina de Buenos Aires, viuda de Alonso de Herrera, e hija del Capitán Juan de San Martín y de Gerónima Gutiérrez de Paz, sin sucesión. En 1758 testa en Buenos Aires Ana de San Martín (AGN, Protocolos, Registro 6, 1762/63, fs.238).

<sup>4085</sup> Ver Apéndice C-I.

<sup>4086</sup> Martínez Villada, 1940, 46.

<sup>4087</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2.

<sup>4088</sup> Di Lullo, 1949, 55.

<sup>4089</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.2, fs.4v.

<sup>4090</sup> hija de Sebastián Alegre y María del Carmen Acosta.

---

<sup>4091</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1.

<sup>4092</sup> *Ibídem*, fs. 16v.

<sup>4093</sup> *Ibídem*.

<sup>4094</sup> *Ibídem*.

<sup>4095</sup> marido de Ignacia Galarza, y suegro de José Antonio Machado, natural del lugar de Fuentes, Portugal (Mazzuchi, 1992, ítem 442).

<sup>4096</sup> Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaíso (Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; Maeder, s/f, 87). Como Gobernador de Misiones fue designado a renglón seguido de Bernardo Garmendia (Damianovich, 1987, 119).

<sup>4097</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

<sup>4098</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 9.

<sup>4099</sup> *Ibídem*, fs.43.

<sup>4100</sup> hijo de Alonso Hidalgo Viera y Torres y de Lorenza Casajús y Fernández, sobrino de Bernardo Casajús y cuñado de Juan Estéban Martínez.

<sup>4101</sup> Labougle, 1953, 271, cita sin mencionar la fuente el texto del expediente existente en AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.36v.

<sup>4102</sup> Maeder, 1981, 152.

<sup>4103</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.36v.

<sup>4104</sup> *Ibídem*.

<sup>4105</sup> Actas Capitulares de San Luis (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1983), II, 451ss, citado por Díaz Coucelo, 1985, 272.

<sup>4106</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

<sup>4107</sup> Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros al Consejo de Regencia, 22 de junio de 1810 (Mayo Documental, XII, 48).

<sup>4108</sup> Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera, mujer de Pedro Zansón, hermano entero de Juana y Bernardo de Arce, medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de Mendoza, mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas (hijo de Bernardino de Echazú y de Doña Agustina Gareca), y tío de José Patricio de Antequera (Morales, s/f, 98; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16, fs.23).

<sup>4109</sup> Sobrino de Urbano Espejo (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp. 16). Entre 1755 y 1757 contrajo con mercaderes porteños diez operaciones de fiado por valor de \$13.168, importando yerba del Paraguay (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7, fs.9v.). Su confirmación como Regidor de Tarija se obtuvo por Real Provisión de 3 de abril de 1764 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10; y Leg.14, Exp.8). El despacho de Coronel del batallón de Milicias se libró en 1775 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10). En 1782 recurre ante el Superior Gobierno por los agravios que le infirió el Cabildo de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.8). En 1786 presenta sus fojas de servicio para aspirar al título de Mariscal de Campo (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.10, Exp.11). Probablemente era hermano de José Hurtado de Mendoza, quien contrajo con mercaderes porteños, entre 1764 y 1785, media docena de operaciones de fiado por valor de \$17.331.

---

<sup>4110</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 125, Exp.16.

<sup>4111</sup> Teniente Gobernador de Tarija, marido Bartolina Morales, y padre de Josefa Gertrudis de Echalar y Morales, nacida en Tarija, y mujer del Comandante de Armas de Salta General Domingo de Isasmendi y Ormazábal, nacido en Marín en noviembre de 1700, Encomendero de los Molinos, viudo de María Magdalena Díez Gómez y Castellanos.

<sup>4112</sup> Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera, mujer de Pedro Zansón, hermano entero de Juana y Bernardo de Arze, medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de Mendoza, mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas (hijo de Bernardino de Echazú y de Doña Agustina Gareca), y tío de José Patricio de Antequera (Morales, s/f, 98; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16, fs.23).

<sup>4113</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7.

<sup>4114</sup> Probablemente hijo de Francisco Ruiloba y de Paula de Arce y Flores de Burgos, quien contrajo entre 1728 y 1739 tres operaciones de fiado con mercaderes porteños por valor de \$13.152 (Morales, s/f, 98; AGN, Protocolos, Registro 3, año 1728, fs.481 v.; año 1734, fs.672; y año 1739, fs.497).

<sup>4115</sup> Alguacil Mayor de Tarija (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.34, Exp.1008).

<sup>4116</sup> Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

<sup>4117</sup> sobre la Real Pragmática de Matrimonios, ver Andreucci Aguilera, 2000; y Saether, 2003.

<sup>4118</sup> Hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de la estancia La Herradura y La Rinconada sobre el Río Tercero, y de Micaela de Funes, esposa del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, 1968, II, 143).

<sup>4119</sup> Pueyrredón, 1958, 252.

<sup>4120</sup> Pueyrredón, 1958, 257; Lazcano, 1968, II, 134.

<sup>4121</sup> Pueyrredón, 1958, 257.

<sup>4122</sup> *Ibidem*.

<sup>4123</sup> Para los candidatos a becas consultar Endrek, 1966, capítulo IV.

<sup>4124</sup> Vial Correa, 1965, 22.

<sup>4125</sup> Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

<sup>4126</sup> Burgess, 1925; McKenzie, 1925; Park, 1926; y Duncan y Luberson, 1959. Para más información, ver Harris, 1979, 71-75.

<sup>4127</sup> Sobre la descomposición étnica en la campaña del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, ver Kaempfer, 2006.

<sup>4128</sup> Merton, 1949; Lenski, 1954; Smelser, 1963; Johnson, 1964, 1966; Tiryakian, 1967; Jessop, 1972; y Hagopian, 1974; citados por Goldstone, 1980.

<sup>4129</sup> ver Gordon (1964), Hechter (1971), Bonacich (1973) y Saguier (1985).

<sup>4130</sup> Kurien, 1994, 388.

<sup>4131</sup> Para una explicación más detallada de las teorías de este autor, ver Laurin-Frenette (1976, 1985),

---

pp.245-248.

<sup>4132</sup> Chance y Taylor (1977, 1979), Valdés (1978), Seed (1982), Seed y Rust (1983) y Wu (1984), citados por Anderson, 1988, 211; y Stoler, 1989, 136.

<sup>4133</sup> Golte y de la Cadena, 1983, 17-19; cit. por Mossbrucker, 1990, 15; y Mossbrucker, 1990, 53.

<sup>4134</sup> Martínez-Alier, 1974, 114. Alexis De Tocqueville nos revela que en aquellos países donde queda un vestigio de aristocracia "...seducir a una doncella de color apenas daña la reputación de un americano, pero casarse con ella le deshonor" (De Tocqueville, 1980, II, 196).

<sup>4135</sup> Caillet-Bois, 1930, 109ss, citado por Tanzi, 1977, 162.

<sup>4136</sup> Rázeri, III, 163.

<sup>4137</sup> Ver Tibesar, 1955; y Lavallé, 1979.

<sup>4138</sup> Bagú, 1952, 113; Rosenblat, 1954, II, 89-90; Stein, 1970, 113-114; Durand Florez, 1974, 101-107; Lipschutz, 1975, 251; y Romero, 1976, 79. El estudio que viene realizando desde hace años el investigador Carlos Jáuregui Rueda acerca de la bastardía en la élite Mendocina de fines del siglo XVII cambiará radicalmente la perspectiva tradicional que ha predominado hasta hoy sobre este tema.

<sup>4139</sup> A diferencia del etno-centrismo decimonónico, de base laica y socio-darwinista, el etno-centrismo de la modernidad absolutista se caracterizaba por poseer una base religiosa (debo esta distinción a mi discípulo y amigo Pablo Lacoste). Para Botana, en una comunicación personal, mientras el etno-centrismo del siglo XIX era de sociedad civil, el del siglo XVIII era propio del corporativismo de la modernidad absolutista.

<sup>4140</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.51v.

<sup>4141</sup> Moyano Aliaga, 1973, 11.

<sup>4142</sup> Era Doña Gertrudis hija de Santiago Ladrón de Guevara y de Francisca Cevicos Desa, y ésta última hija a su vez del Sargento Mayor Melchor Deza y Tovar, nacido en Jujuy, y de Rosa Carranza y Villafañe (Lazcano, 1936, I, 128; y Moyano Aliaga, 1973, 10-14).

<sup>4143</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp. 26, fs. 15.

<sup>4144</sup> Probable antecesor del Dr. Domingo García, radicado en Tucumán, y célebre por ser marido de Fortunata García, la heroína que se atrevió a rescatar la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán, de la pica donde la había clavado el General Oribe.

<sup>4145</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp. 26, fs. 15.

<sup>4146</sup> Alcalde de Mendoza en numerosas oportunidades.

<sup>4147</sup> Hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte.

<sup>4148</sup> Cutolo, 1936, I.

<sup>4149</sup> Di Lullo, 1949, 55.

<sup>4150</sup> Labougle, 1941, 20.

<sup>4151</sup> Hijo de Bernardo Casajús y Fernández de Aranda y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús. Cuando su madre enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús, hija de Sebastián Casajús y María Carvalllo. Era cuñado del Regidor José Ignacio de Beláustegui, de los Alcaldes José Sánchez Moreno y Manuel González de Horduña, y de

---

Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis Cabral y Soto.

<sup>4152</sup> Nacido en Corrientes en 1715, hijo de María Sandoval, Alcalde de Primer Voto en 1754 y 1769, Tesorero de Real Hacienda en 1755-64, Procurador General en 1785, participó en la Guerra Guaranítica y se adhirió a la rebelión Comunera de Corrientes (Maeder, 1987, 348; y 1988, 123). Fué padre de Don José Ignacio Añasco, casado con hija de Doña Rosa Ramírez.

<sup>4153</sup> Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaíso (Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; y Maeder, s/f, 87).

<sup>4154</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

<sup>4155</sup> Maturana (1906) cuenta que siendo en el siglo XVII la población de Chile eminentemente criolla, "...la Provincia de Agustinos lo fue en grado tal que nunca en ella existió el Régimen de Alternativa, que tanta ruina y desprestigio acarreo a las demás Provincias de la Orden" (Maturana, 1906, II, 114). Tibesar (1955) y Lavallé (1979) revelan que ya en el siglo XVII los frailes criollos habían mostrado su rebeldía logrando la aplicación del régimen de la Alternativa, por el cual siempre compartían el gobierno de los conventos un peninsular y un criollo.

<sup>4156</sup> Sobre la definición de criollo, ver Arrom, 1953, 265-272.

<sup>4157</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

<sup>4158</sup> Nacido en Charcas, hijo de Jacinto Bernardo de Aldao y de María Teresa Rendón y Lariz; marido de Josefa de Aragón y Avendaño, hija del mercader José de Aragón y de su segunda mujer María de Avendaño; hermano mayor del Regidor Decano de Santa Fé Juan Francisco Aldao, quien figura como padrino de uno de sus hijos; y cuñado e íntimo amigo del poeta Juan Manuel de Labardén y de Manuel de la Quintana (Fernández de Burzaco, I, 61-62 y 127; y V, 253).

<sup>4159</sup> Socolow, 1987, 135.

<sup>4160</sup> Hijo de Vicente de Azcuénaga y de Rosa de Basabilbaso; marido de su prima hermana Justa Rufina Basabilbaso Garfias; y cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar de Santa Coloma, y del Virrey del Río de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (Fernández de Burzaco, 1986-90, I, 201).

<sup>4161</sup> Suplementaria del Reglamento de Milicias de la Isla de Cuba, por la cual se tenían por exentos de ser alistados en los Batallones y Cuerpos de Milicias los comerciantes de Registro; los Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o mancebos,

<sup>4162</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109.

<sup>4163</sup> *Ibidem*.

<sup>4164</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.2, fs.4v.

<sup>4165</sup> *Ibidem*.

<sup>4166</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

<sup>4167</sup> Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros al Consejo de Regencia, 22 de junio de 1810 (Mayo Documental, XII, 48).

<sup>4168</sup> Gregorio Funes al Virrey, Córdoba, 24-VI-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

<sup>4169</sup> *Ibidem*. Dicha acusación recayó en los hermanos Funes, pese a ser Ambrosio Funes marido de María

---

Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa.

<sup>4170</sup> Fué miembro de la Academia de Práctica Forense de Chuquisaca (Cutolo, 1963, 114).

<sup>4171</sup> Ver Apéndice XXII.

<sup>4172</sup> Hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de la estancia La Herradura y La Rinconada sobre el Río Tercero, y de Micaela de Funes, viuda del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, 1968, II, 143).

<sup>4173</sup> Pueyrredón, 1958, 252.

<sup>4174</sup> Pueyrredón, 1958, 257; Lazcano, 1968, II, 134.

<sup>4175</sup> Pueyrredón, 1958, 257.

<sup>4176</sup> *Ibidem*.

<sup>4177</sup> había sido designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José Agustín Álvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

<sup>4178</sup> Acevedo, 1965, 457.

<sup>4179</sup> Altamira, 1943, 146.

<sup>4180</sup> Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17 de mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728, y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201, Exp.2 y 3).

<sup>4181</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350. Aparentemente, en aquellos tiempos se solicitaba ser miliciano sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar "...y no para servir en la Guerra del Chaco, ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años pasados en las Provincias Peruanas". Para confirmar este aspecto de la denuncia, Archondo afirmaba que "...luego que se tuvo la noticia infausta de la toma de Buenos Aires por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se ocultaron los citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital" (*Ibidem*).

<sup>4182</sup> Acevedo, 1965, 466.

<sup>4183</sup> *Ibidem*.

<sup>4184</sup> *Ibidem*.

<sup>4185</sup> *Ibidem*.

<sup>4186</sup> En el criterio de Arcila Farías (1946), los cosecheros y mercaderes criollos de la Venezuela del siglo XVII, una vez que dispusieron de barcos propios, miraron con hostilidad a las naves metropolitanas que tomaban carga para Veracruz, y trataron de entorpecer su comercio, hasta lograrlo e imponerse finalmente en el mercado mexicano (Arcila Farías, 1946, 91 y 451). Más tarde, en el siglo XVIII, dichas rivalidades entre el "comercio nativo" y los intereses de la Compañía Guipuzcoana se reiteraron. La

---

historiadora brasileña Lahemeyer Lobo (1985) sostiene que la burguesía mercantil local brasilera, atacó el régimen monopolista de flotas al igual que condenaba el abuso en la elevación de los precios de mercancías y fletes, la preferencia por las embarcaciones de mayor porte y la extrema demora con que las flotas procedentes de Lisboa arribaban a Bahía (Lahemeyer Lobo, 1985, 172). Para Ramos Pérez (1967), los productores de trigo chilenos observaban con disgusto como las naves limeñas tomaban en Valparaíso carga para el Callao y trataron de intervenir en el tráfico, hasta lograr controlar parcialmente el mercado Peruano. Los historiadores Floyd (1961) y Lindo-Fuentes (1984), aseguran que los productores de índigo salvadoreños y hondureños veían igualmente, con resentimiento, como los comerciantes residentes en Guatemala controlaban el tráfico de índigo, imponiendo sus precios de monopolio. A su vez, en su estudio sobre Guatemala, Martínez Peláez (1971) descubre que el embrión pequeño burgués estaba integrado por los comerciantes que no se beneficiaban con el monopolio y que no gozaban de relaciones exclusivas con las casas españolas, y que por eso mismo se hallaban en un plano de desventaja frente a las mismas. Finalmente, para Golte (1980), la abolición del reparto de mercancías en el mundo andino frustró la posibilidad de que los Corregidores de pueblos de indios se constituyeran en un embrión burgués. Asimismo, para Tandeter (1980), los productores de plata Altoperuana (azogueros), fueron incapaces de iniciar un proceso de acumulación de capital, pese a la extraordinaria bonanza geológica experimentada, debido fundamentalmente a la ingente sobrecapitalización del trabajo mitayo oculta en los altos arrendamientos devengados a la élite propietaria ausentista. En efecto, pese al postrer boom minero experimentado por el Alto Perú, a mediados del siglo XVIII, la élite Altoperuana --a diferencia de otras élites agro-mineras, como la de Antioquia en Colombia (Ospina Vázquez, 1956; Safford, 1965; y Dávila L. de Guevara, 1990)-- habría sido incapaz de liderar un proceso de acumulación de capital, y de engendrar un comportamiento empresarial y un patrón de inversiones diversificadas. El reparto mercantil y la azoguería, habrían fracasado como proyectos de acumulación "burguesa", el primero a juicio de Golte, "...debido a sus contradicciones internas, a la resistencia del poder colonial y a la de cuantos resultaban perjudicados por el proceso de acumulación y monopolio comercial" (Golte, 1980, 206); y el segundo, a juicio de Tandeter (1980), debido a la delicada ecuación que la demografía mitaya (cuya adquisición absorbía los beneficios brutos) mantenía con la geología del cerro del Potosí.

<sup>4187</sup> para el caso del Río de la Plata en el siglo XVIII, permítaseme citar a Saguier, 1994b, 1994c, 1994d, y 1994e.

<sup>4188</sup> Según el capítulo IX de las Ordenanzas de Bilbao, todo Mercader Tratante y comerciante por mayor debía llevar el Libro Borrador o Manual, el Libro Mayor, el Libro para el asiento de cargazones o facturas, y el Copiador de cartas. También estaba obligado a formar balance, y sacar razón de estado de sus dependencias activas y pasivas de tres en tres años. En el Libro de cargazones se asentaba por menor todas las mercaderías que se recibían, remitían, o vendían con sus marcas, números, pesos, medidas, y calidades expresando su valor, apuntándose el día, cantidad, precio, y sujeto comprador. Por otro lado, en toda tienda donde se vendía al por menor debía tenerse por lo menos un libro en que se fueran formando todas las cuentas de mercaderías, que se compraren y vendieren al fiado, con la expresión de nombres, fechas, cantidades, plazos, y calidades. Acerca de los privilegios del fuero consular vis a vis los fueros capitular, eclesiástico y militar, permítaseme citar a Saguier, 1994a.

- 
- <sup>4189</sup> Brading, 1975, 147.
- <sup>4190</sup> Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Tribunales, Leg. D-2, Exp. 9, fs.128.
- <sup>4191</sup> Acerca de la financiación de la carrera de Indias, ver Bernal, 1992.
- <sup>4192</sup> natural de Lamedo, Montañas de León, marido de Francisca Ignacia Pérez, hija de Juan Mateo Pérez y Ana María Dávila (Fernández de Burzaco, VI, 262).
- <sup>4193</sup> Natural de Sevilla, hijo de Antonio de San Pedro y de Patricia Lorente; marido de Petrona de la Llama, natural de Buenos Aires, hija de Pedro de la Llama y Micaela Arévalo Tufiño; hermana de Pascual de la Llama; y suegro de Bautista de Olazábal, nacido en Irún (Fernández de Burzaco, IV, 207; y V, 57; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5606).
- <sup>4194</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. F-5, Exp. 14, fs. 165.
- <sup>4195</sup> Idem.
- <sup>4196</sup> Idem, fs. 38.
- <sup>4197</sup> Acerca de la educación en España de los hijos de comerciantes ver Martínez (1985). Para el caso de Anchorena, ver Poensgen, 1992.
- <sup>4198</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 8, fs. 108v.
- <sup>4199</sup> Lipset, 1951, 143.
- <sup>4200</sup> Idem, p. 209.
- <sup>4201</sup> Caro Baroja, 1985, 231, citado por Cruz, 1990, 252.
- <sup>4202</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1736, fs.761; R.3, 1737, fs.757v.; R.1, 1739, fs.532; R.3, 1741, fs.178; R.3, 1742, fs.105v.; y R.3, 1745, fs.326 y 316v.
- <sup>4203</sup> Luis Sabatini a Miguel Ryan, Buenos Aires, 29-XII-1785 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 46, Exp. 1195, fs. 200).
- <sup>4204</sup> natural de Potosí, marido de Maria Antonia de Bustos Peñalba (Fernández de Burzaco, VI, 186).
- <sup>4205</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, 1759, fs. 368v.
- <sup>4206</sup> Hijo de Bernardino del Pozo y Garro y de Teresa Giménez Naharro (Fernández de Burzaco, V, 239).
- <sup>4207</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1764/65, fs. 33v.
- <sup>4208</sup> marido de Isabel Calleros (Fernández de Burzaco, IV, 241).

---

<sup>4209</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1772, fs.9.

<sup>4210</sup> AGN, Protocolos, Reg. 4, 1789, fs. 72v.

<sup>4211</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1791, fs. 73.

<sup>4212</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1792, fs.315.

<sup>4213</sup> AGN, Protocolos, Reg. 5, 1793, fs.59.

<sup>4214</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1797, fs.215v.

<sup>4215</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs.120.

<sup>4216</sup> AGN, Sala IX, 4-7-5.

<sup>4217</sup> Teniente de Infantería de Marina, nacido en Cádiz, hijo de Juan de los Reyes Serrano y de Luisa García y Sotomayor, marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José de Conti y de Francisca Isidora Bermúdez (Fernández de Burzaco, VI, 343).

<sup>4218</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52).

<sup>4219</sup> nacido en la Villa y Puerto de San Julián de Marín, Arzobispado de Santiago de Galicia en 1749 (Lobos, 1979, 429).

<sup>4220</sup> nacido en Oporto, hijo de Manuel Gómez y de Luciana María del Espíritu, y desposado en 1764 con María Justa del Corro, hija del Capitán Pedro del Corro y de Juana Bustos (Fernández de Burzaco, III, 217).

<sup>4221</sup> Lobos, 1979, 432. Probablemente hija de Antonio J. del Corro.

<sup>4222</sup> Martínez Gálvez, 1955, 81.

<sup>4223</sup> padre de Manuel Tezanos Pintos, casado con Josefa Sánchez de Bustamante Gonsález de Araujo, hija de Domingo Manuel Sánchez de Bustamante y de María Tomasa Gonsález de Araujo, jujeños (Cutolo, VII, 316).

<sup>4224</sup> Capitán del Regimiento de Milicias Voluntarias de Caballería de Tucumán, Alcalde de Segundo Voto de Tucumán en 1799. Bautizado en junio de 1759, hijo de José Antonio de Zavalía y Urquiaga y de María Josefa Lorenza de Andía-Varela y Zamorategui. En 1788 es enjuiciado por desfalco (AGN, Criminales, Leg.33, Exp.4). A juicio del expatriado abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, cuando se supo que Zavalía fué elegido Alcalde todo el pueblo quedó "...aterrado y atemorizado". De resultas de dicha noticia "...se reunieron los principales vecinos imparciales e informaron al Gobierno de Salta, oponiéndose a la elección, asegurando con exemplares auténticos, que cuando Zavalía fuese confirmado, pegaría fuego a aquel vecindario, y que serían víctimas de su furor todos los que no habían seguido el partido de Cayetano Rodríguez". Alega incluso Barón como interrogante "...si fueron ocupados de un terror pánico sus mismos

---

cuñados, y todos los parientes de su mujer, por haber jurado Zavallía, que estos serían los primeros a quienes pondría en la cárcel" (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulos 344 y 345).

<sup>4225</sup> cuñado de Pedro José Lami, casado con Inés Bravo de Rueda; y suegro de Agustín de Alurralde Ojeda (Avila, 1920, 282; Calvo, I, 51; Cutolo, VII, 824; Di Lullo, 1948, 162).

<sup>4226</sup> Avila, 1920, 50; y Calvo, 1936, I, 49.

<sup>4227</sup> padres de Pedro José Velarde, marido de Bárbara Urrea (Avila, 1920, 91). Fué José Velarde Interventor de la Renta de Correos de Tucumán, Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires. Renuncia a éste último cargo en 1800 (AGN, Hacienda, Leg.96, Exp.2485).

<sup>4228</sup> Francisco Gabriel Arismendi, Juan Bautista Azcuénaga, Martín de Alzaga, Isidro José Balbastro, Francisco Belgrano, José Alberto Chavarría, Pedro Duval, Juan Angel de Lascano, Juan Antonio de Lezica, Gerónimo de Matorras, José Riera, Anselmo Sáenz Valiente, Manuel Joaquín de Tocornal y Benito Viñas y Freyre.

<sup>4229</sup> Nacido en el lugar de Paul, Castelo Branco, Obispado de la Guardia, Portugal. Hijo de Dámaso Duarte y de María Fernández; marido de Micaela Pelliza Briñole, hija de Domingo Briñole Pelliza, natural de la República de Génova y de Rosa María del Rubio; y suegro de José Francisco Lascano y Juan Cayetano de Molina (Fernández de Burzaco, II, 256; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5002).

<sup>4230</sup> Marido de María del Carmen Alvares, y padre de Manuel Antonio López de Vigo (Jáuregui Rueda, 1989, ítem 4955).

<sup>4231</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-4, Exp. 16, fs. 79v.

<sup>4232</sup> Idem, fs. 80.

<sup>4233</sup> Idem.

<sup>4234</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1939, fs. 17.

<sup>4235</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154.

<sup>4236</sup> "...El caso es, que el bien que les resulta a los Comerciantes de España en el referido menudeo, es momentáneo y accidental, porque por el se privan de la venta en mayor, que para revender les compran los tenderos, y haciendo ellos el comercio, que estos, mal pueden comprarles, sino les ha de resultar utilidad en el menudeo. Los Catalanes con los caldos hasta forman baratillos, y las pulperías, que pagan los derechos de composición y alcabala, perecen" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

<sup>4237</sup> Julián Gregorio de Espinosa, uno de los comerciantes de mayor giro en Buenos Aires le adelantaba en 1758 a José Rodríguez, residente en Montevideo, \$2357 en mercaderías para vender en la Banda Oriental con la condición "...de que no se mezclara en tratos ilícitos por cuanto si eso pasara y llegara ello a los oídos del acreedor sería la

---

primer excusa para quitarle el manejo de la tienda" (AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 3, años 1757/58, fs. 756v.).

<sup>4238</sup> llamadas tiendas mestizas en México.

<sup>4239</sup> En los autos entre Alberto Reina y Antonio Troyano alega Reina "...¿que perjuicio puede irrogar el ejercicio de mi oficio [de sastre], al manejo de la pulpería?. Si como es cierto están las más horas del día libres y desembarazadas los pulperos hasta que llegan aquellas que pican las ventas como podra computar este oficio de pulpero, y aquel ejercicio de sastre por incompatibles. La incompatibilidad no es otra cosa según creo, que una imposibilidad, p física o moral, de dos cosas que pugnan en su existencia, de tal modo, que el ejercicio de una arguya en el juicio de los prudentes, ser bastante impedimento para el ejercicio de la otra. Por este principio que da bastantemente concluído, que el ejercitarse en mi oficio [sastre] a aquellas horas, que cesaba el despacho de la pulpería no pudo ser obstaculo a la administración de dicha pulpería ni ceder en perjuicio de sus utilidades. No podra negar Troyano, ni otro alguno que ha servido el trafico de una pulpería que las ventas de esta tienen sus horas del día y de la noche determinadas. Y así cuando regularmente se vende es en la mañana hasta las ocho, el medio día, y la primera noche; y si pasadas estas horas ay alguna venta es contingente, y no segura" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

<sup>4240</sup> Son los tenderos que fueron mercachifles quienes mas fuertemente impugnaban a estos últimos, acusandolos de asaltar o sorprender a rústicos campestres, sugiriendo en ellos llanezas pecaminosas, veleidades, desórdenes, y relaciones graves (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 8, Exp. 4, fs. 13.).

<sup>4241</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 26, Exp. 5, fs. 21v.

<sup>4242</sup> "...A Don Casimiro Catalan pulpero ¿quién lo mató sino una junta de indios ebrios que estaban en su pulpería? ¿quién ocultó el robo que hacía a sus amos una esclava del Lic. Don Juan Manuel de Labardén sino un pulpero? ¿qué ocasionó la muerte de Don Pedro Obredor, sino la diferencia que tubo en el juego en una pulpería? ¿que ocasionó otra muerte en la pulpería de Don Manuel del Valle sino una junta de ebrios; ¿que ocasionó el robo de \$800 que demandó Don Ramón de la Torre pulpero, sino el dar entrada para que durmiese en su pulpería un negro esclavo? ¿dónde se encontró un baúl de ropa que robaron a una mujer que vivía en casa de Don Pedro José de la Quadra, sino en una pulpería de unos gallegos donde había traído un negro dicho baúl? ¿dónde se vieron dos hermanos ebrios embestirse sobre disputa de juego y proferirse blasfemias sino en la pulpería de Don Ignacio López?" (AGN, Sala IX, Interior, Leg. 26, Exp. 5, fs. 22).

<sup>4243</sup> Idem.

<sup>4244</sup> Idem.

<sup>4245</sup> Idem.

<sup>4246</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 20, Exp. 5, fs. 10v.

<sup>4247</sup> Nacido en Pontevedra, Galicia, hijo natural de Josefa Torres de la Mata y casado con Teodora Marín, hija de Juan Marín y de María Viveros (Fernández de Burzaco, IV,

---

400; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 1906).

<sup>4248</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Q-1, Exp. 7, fs. 62.

<sup>4249</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 275, Exp. 5, fs. 64.

<sup>4250</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 275, Exp. 5, fs. 120v.

<sup>4251</sup> Idem, fs. 127v.

<sup>4252</sup> Natural de la Ciudad de Ronda, Málaga; hijo de Juan Troyano y de Isabel Garcés; marido de Ursula Cuello y Utrera; y suegro de Antonio Ortiz, José Bernal, Manuel Osoles, Manuel Fernández y Juan Angel Aramburu (Fernández de Burzaco, VI, 206).

<sup>4253</sup> Natural de Ronda, hijo de Juan de Reyna y Francisca Pereila, y marido de Josefa Sánchez, hija de Silverio Sánchez y de Josefa López Barrera (Fernández de Burzaco, V, 291; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5614).

<sup>4254</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-13, Exp. 11, fs. 273.

<sup>4255</sup> Abogado de la Real Audiencia de Charcas.

<sup>4256</sup> AGN, Protocolos, Reg. 2, 1789, fs.508.

<sup>4257</sup> Casó con María de los Dolores Martínez. Fué padre del Teniente de Milicias Provinciales José María Fernández de Acevedo, marido de Juana Francisca Buenaventura Belgrano y González Castro (Fernández de Burzaco, III, 33; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 4989).

<sup>4258</sup> AGN, Protocolos, Reg. 4, 1787, fs. 487v.

<sup>4259</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. F-5, Exp. 7, Fs. 1

<sup>4260</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-17, Exp. 13, fs. 48v.

<sup>4261</sup> Para rastrear el origen medieval de esta propensión colectiva vigente en la España Borbónica ver Sicroff (1960).

<sup>4262</sup> Kofler, 1974, 103 y 126; y Atienza, 1987.

<sup>4263</sup> Zagorin, 1982, 71; y Brenner, 1985, 299.

<sup>4264</sup> Tudesq, 1978, 251.

<sup>4265</sup> Haigh, 1963, 1.

<sup>4266</sup> Cornblit, 1972, 137.

<sup>4267</sup> Vilar, 1981, 211; Bonilla y Spalding, 1981, 97; Domínguez, 1985, 283; y O'Phelan Godoy, 1985, 156.

<sup>4268</sup> Cajas de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990, 569.

---

<sup>4269</sup> "...Tratamos tan bien a nuestros esclavos, que no hay ejemplar de haber estos procurado libertad, pudiéndola conseguir yéndose a unir con los indios infieles que en todas partes nos cercan" (Azara, 1943, 20-21).

<sup>4270</sup> Ingenieros, 1900, 234.

<sup>4271</sup> Álvarez, 1914, 181.

<sup>4272</sup> Puiggrós, 1940, 196.

<sup>4273</sup> Mariátegui, 1928; Oddone, 1937; Peñaloza, 1946; Griffin, 1949; Gil Munilla, 1950; Barreiro, 1951; Ramírez Necochea, 1959; Bliss, 1959; Carracedo, 1960; Kossok, 1968; Stein, 1970.

<sup>4274</sup> Arcila Farías, 1946, 91 y 451; y Domínguez, 1985, 108-114

<sup>4275</sup> Kikza, 1992, 287.

<sup>4276</sup> Lahemeyer Lobo, 1985, 172.

<sup>4277</sup> Paso, 1975, 73.

<sup>4278</sup> Marx, 1959, t.I, 103.

<sup>4279</sup> Assadourian, 1973, 53.

<sup>4280</sup> Semo, 1978, 167 y 187.

<sup>4281</sup> ver Saguier, 1992, 69-70.

<sup>4282</sup> Sobre el poder naval español, 1589-1665, ver Goodman, 1997. Sobre cómo España construyó su poder imperial, ver Kamen, 2003.

<sup>4283</sup> Sobre el control del comercio en la cuenca del Mississippi, ver Clark, 1970. Sobre el Galeón de Manila, ver Schurz, 1992. Sobre el Consulado de La Habana, ver Lampros, 1980.

<sup>4284</sup> Saguier, 1986 y 1989.

<sup>4285</sup> Knight, 1990, 176.

<sup>4286</sup> Patterson, 1981, 227.

<sup>4287</sup> ver este interesante caso en "María Ilaria Aragón con Máximo Molina s/alimentos" (AGN, Tribunal Civil, Leg. A-26).

<sup>4288</sup> Zerda de Cainzo, 1973, 567.

<sup>4289</sup> En un próximo estudio analizaremos por computación miles de adquirentes extra-judiciales registrados en las transacciones notariales de Buenos Aires.

<sup>4290</sup> acerca de este personaje ver Morquio Blanco (1990).

<sup>4291</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1725, fs.302v.; y Reg.3, 1727, fs.376.

<sup>4292</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.409v.; y Reg.3, 1729, fs.159.

<sup>4293</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.410v.; y R.5, 1765, fs.198.

<sup>4294</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1797, fs.315.

---

<sup>4295</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1765/69, fs.133.

<sup>4296</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.707v.

<sup>4297</sup> marido de María Josefa Gándara, parda libre (AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.).

<sup>4298</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1814, fs.9v.

<sup>4299</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1813, fs.46v.

<sup>4300</sup> Venta de Dionisio Aberastegui a Prudencio Sagari en \$300 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1815, fs.26).

<sup>4301</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1788, fs.143v.

<sup>4302</sup> ventas de José Antonio Arquero a Salvador Cavat (AGN, Protocolos, Reg.1, 1787, fs.179); de Joaquín Torres a Agustín Mosquera (AGN, Reg.3, fs.461v.); de Luis Ramírez a Manuel Maturel (AGN, Reg.2, 1790, fs.363); de Juan Polero a Benito Padín (AGN, Reg.2, 1795, fs.366); de Miguel Serra a María Lucía Aldao (AGN, Reg.7, 1804, fs.218); de Martín José Torres a Manuela Sostayta (AGN, Reg.3, 1812, fs.369); y de Florentina Vico a Baltasar Merlo (AGN, Reg.2, 1817, fs.369).

<sup>4303</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1790, fs.2.

<sup>4304</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1797, fs.10v.

<sup>4305</sup> *Ibidem*.

<sup>4306</sup> Venta de Juan de Moreira a Petrona Gibaja en \$400 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.250).

<sup>4307</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1784, fs.111.

<sup>4308</sup> Miguel Escudero a Isidro Fernández, San Nicolás, 28-XI-1798 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1798, fs.566).

<sup>4309</sup> Venta de Margarita de Herrera al Sargento Mayor Simón de Videla, pardo, en \$350 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1716/1719, fs.597).

<sup>4310</sup> Poder librado por Sebastián Rodríguez a favor de Juan José Granados, residente en el pueblo de Santa Lucía, jurisdicción de Corrientes (AGN, Protocolos, Reg.6, 1797, fs.202v.).

<sup>4311</sup> Poder librado por Tomás Baraona a favor de Miguel Cavallero (AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.136v.).

<sup>4312</sup> Mayo, 1985a, 68.

<sup>4313</sup> Albores, Mayo y Sweeney (1977) refieren que las fugas de esclavos producidas en la estancia de Santa Catalina, después de la expulsión de los Jesuitas, "...obedecieron al deseo de reunirse con el resto de su familia cuando esta había sido vendida" (Albores, et.al., 1972, 10).

<sup>4314</sup> Poder librado por Gonzalo Villoldo, un hacendado del pago de la Magdalena, a favor de José de la Pezina, residente en Salta (AGN, Protocolos, Reg.3, 1729, fs.275).

<sup>4315</sup> Poder librado por Pedro Fernández a favor de Juan José de Paz, vecino del Tucumán (AGN, Protocolos, Reg.3, 1760/61, fs.36v.).

<sup>4316</sup> Poder librado por Gerónimo Aréchaga a favor de Domingo Ferrando, vecino de Santiago del Estero para cobrar una esclava que hubo y compró a Teodora Paz, vecina de Santiago del Estero (AGN, Protocolos, Reg.5, 1785, fs.460v.).

- 
- <sup>4317</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.128, Exp.4, fs.6-7.
- <sup>4318</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1800, fs.11v.
- <sup>4319</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1811, fs.51v.
- <sup>4320</sup> marido de María Josefa Gándara, parda libre (AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.).
- <sup>4321</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1812, fs.24.
- <sup>4322</sup> Venta del Dr. Agustín Pío de Elía a Agustín Wright (AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183).
- <sup>4323</sup> *Ibidem*.
- <sup>4324</sup> *Ibidem*.
- <sup>4325</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183.
- <sup>4326</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.867.
- <sup>4327</sup> Venta de Francisco Payse al lenguaráz Blas Pedrosa (AGN, Protocolos, Reg.5, 1798, fs.208v.).
- <sup>4328</sup> Poder librado por el Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez a favor de Melchor del Arco (AGN, Protocolos, Registro 3, 1764-65, fs.285v.).
- <sup>4329</sup> Poder librado por Salvador Escolá en favor de Alonso Araujo, residente en Santiago del Estero (AGN, Protocolos, Registro 1, 1801, fs.32v.).
- <sup>4330</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, 1804, fs.54v.
- <sup>4331</sup> Venta de Pedro Pablo Funes, apoderado de su cuñado Eugenio López, vecino de San Juan, a Juan Domingo Banegas (AGN, Protocolos, Registro 4, 1808, fs.402).
- <sup>4332</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1790, fs.2.
- <sup>4333</sup> Petit Muñoz, 1947, 268.
- <sup>4334</sup> Poder de Margarita de Benavidez, viuda de Juan de Gaete, a favor de Ignacio Moreno (AGN, Protocolos, Reg.3, 1749, fs.305).
- <sup>4335</sup> ubicada donde actualmente reside el Jardín Botánico.
- <sup>4336</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1754, fs.522.
- <sup>4337</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1755/58, fs.356v.
- <sup>4338</sup> Venta del Alcalde Juan Benito González a Juan García Polanco (AGN, Protocolos, Reg.6, fs.447).
- <sup>4339</sup> Poderes librados por Tomás Baraona primero en 1762 a favor de José Cano Cortés, vecino de Córdoba, y luego en 1765 a favor de Pedro de la Torre, también vecino de Córdoba (AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.410v.; y R.5, 1765, fs.198).
- <sup>4340</sup> Poder librado por Juan de Matos a favor de Cristóbal Rodríguez para demandar al Capitán y Maestre del navío El Temor (AGN, Protocolos, Reg.5, 1769, fs.137v.).
- <sup>4341</sup> Poder de Manuel Pacheco, hacendado y vecino del Partido de las Vívoras, a favor de Pedro Larrosa (AGN, Protocolos, Reg.4, 1770/71, fs.382v.).

---

<sup>4342</sup> Poder librado por Domingo Belgrano Pérez a favor de Casimiro Olivera y José de Sosa Lima, vecinos de Santiago del Estero (AGN, Protocolos, Reg.6, 1783, fs.219).

<sup>4343</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.170, Exp.5.

<sup>4344</sup> Petit Muñoz, 1947, 402.

<sup>4345</sup> ver para ello las declaraciones de Rafael de Soto y de Blas Pedroza, publicadas por Mayo (1985c).

<sup>4346</sup> hija de Januario Fernández do Eijo y de María Ignacia de Echeverría, y mujer de Francisco Antonio Piñeyro y Cerqueyro (FB, III, 41).

<sup>4347</sup> Poder librado por Josefa Fernández Noario, hacendada en el pago de la Magdalena, a favor de Pedro Blas Escribano para cobrar de manos de Vicente Berro, vecino de Montevideo (AGN, Protocolos, Reg.7, 1814, fs.58v.).

<sup>4348</sup> hijo del Capitán Lorenzo Rodríguez Flores, muerto por los indios, y de María Manuela Barragán y Caraballo; y cuñado de Antonio del Barranco (FB, V, 378).

<sup>4349</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1757/58, fs.682.

<sup>4350</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, fs.59.

<sup>4351</sup> Mayo, 1985b, 239.

<sup>4352</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1775, fs.180.

<sup>4353</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1802, fs.225v.

<sup>4354</sup> Según la ley romana conocida por el nombre de postliminium, el ciudadano romano "...que caía capturado y era esclavizado por el enemigo perdía sus derechos de ciudadano; pero si se las arreglaba para escapar, por el medio que fuese, y regresaba a territorio romano, de inmediato se le restauraba su estatus libre anterior...a menos que hubiere sido redimido a cambio de dinero y hasta que el derecho del redentor fuera cancelado enteramente" (Patterson, 1993, 449).

<sup>4355</sup> hija de Manuel de Lízola y de Ana Escobar y Gutiérrez de Paz, viuda del Capitán Juan Maciel del Aguila, y hermana de Juan Francisco, Juana y Josefa Lízola y Escobar (Azarola Gil, 1940, 83; JR, 1987, ítem 2154; y FB, IV, 214).

<sup>4356</sup> AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

<sup>4357</sup> *Ibidem*.

<sup>4358</sup> debe ser Juan Francisco de Lízola y Escobar, hermano de Martina, Juana y Josefa de Lízola (Azarola Gil, 1940, 83).

<sup>4359</sup> AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

<sup>4360</sup> Debbasch, 1981, 126.

<sup>4361</sup> AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

<sup>4362</sup> *Ibidem*.

<sup>4363</sup> *Ibidem*.

<sup>4364</sup> Venta de Ignacio Sagastume, vecino del Arroyo de la China, a María Josefa Peralta (AGN, Protocolos, Reg.2, 1816, fs.456).

---

<sup>4365</sup> El nombre de Carrascal habría obedecido al hecho de ser un sitio o monte poblado de carrascas o encinas, con cuyas maderas se habrían fabricado en ese entonces los barriles para el transporte del aguardiente.

<sup>4366</sup> para similares tratamientos genealógicos en el mundo, ver Bouquet, 1996. Para la invención de linajes guaraníes en las misiones del Paraguay, ver Wilde, 2006.

<sup>4367</sup> Ver el caso de Juan Romero, esclavo de Francisco Romero, por malos tratos en 1804 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.15, Exp.471); el de Cecilio, esclavo de Isidro González, en 1804 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.395); el de Antonio, esclavo de Juan Díaz, en 1809 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.26, Exp.846); el de María Dolores Baygorrí, esclava de Teresa Baygorrí, en 1808 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.22, Exp.709); el de Justo Pastor Barranco, esclavo de Alfonso Barranco, en 1808 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.2, Exp.707); y el de María y Josefa, esclavas de José Joaquín de Araujo, en 1811 y 1813 respectivamente (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg. 143, Exp.3715; y Tribunales Administrativos, Leg.30, Exp.1049).

<sup>4368</sup> Venta de Fr. Juan de Torres O.P. a Miguel Antonio Azuaga, en \$300 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1744/45, fs.457).

<sup>4369</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.8.

<sup>4370</sup> Venta del Juez Juan Baso y Berry a Manuela Villarino (AGN, Protocolos, Reg.7, 1804, fs.257v.).

<sup>4371</sup> AGN, Poder librado por el Cap. Domingo de Villaverde a Juan de Pesoa, vecino de Corrientes (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 79, fs.297).

<sup>4372</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1760/61, fs.399v.

<sup>4373</sup> La lucha de un miembro de las castas por el ascenso social comenzaba por la conquista de un apellido hispánico, seguida por el uso de indumentaria europea, y el acceso a la educación (Roig, 1982, 22).

<sup>4374</sup> hija del Cap. Pedro de Salazar y de Luisa de Azocar (FB, VI, 308).

<sup>4375</sup> Poder librado por Inés de Salazar, viuda del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio, otorgado a favor del R.P. José de Aguirre (AGN, Protocolos, Reg.3, 1719, fs.540v.).

<sup>4376</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.70, fs.209.

<sup>4377</sup> Poderes especiales para cobrar librados en 1720 y 1729 por José Antonio de Roxas y Acevedo en favor primero de Agustín Labayén y luego de Francisco de Villamonte, residente en Córdoba, (AGN, Protocolos, Registro 2, 1720/23, fs.1019; y Reg.3, 1729, fs.245).

<sup>4378</sup> Pascual Ibáñez de Echabarry al Virrey Antonio Olaguer Feliú, Buenos Aires, 13 de abril de 1798 (AGN, División Colonia, Comandancia General de Armas, Leg.n.2, Sala IX, 1-8-3).

<sup>4379</sup> Poder librado por Matías Magallanes, hacendado del pago de los Arrecifes, residente de Baradero (AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.68).

<sup>4380</sup> AGN, Protocolos, Registro 7, 1819, fs.196v.

<sup>4381</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1759, fs.59.

<sup>4382</sup> ver McFarlane, 1990, 62.

<sup>4383</sup> especialmente los barrios de Concepción y Monserrat. En su afán por llegar a Buenos Aires un negro esclavo fugado del interior cruzó el Río de Areco a nado en 1780 por el Rincón de Cabrera, en tiempos de

---

crecida, ahogándose en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.280, Exp.17).

<sup>4384</sup> Francisco Antonio de Letamendi a Ambrosio Funes, Buenos Aires, 26 de Febrero de 1800 (Martínez Paz, 1918, 34).

<sup>4385</sup> En los primeros 90 volúmenes de la Capitanía General de Chile indizados por José T. Medina sólo pude hallar un expediente relativo a fuga de esclavos, el de María de Ossa de 1768 (Medina, 1884, Sección I, Estante I, Cajón III, vol. XXVIII, ficha 538).

<sup>4386</sup> Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

<sup>4387</sup> AGN, Protocolos, Reg. 5, año 1804, fs. 54v.

<sup>4388</sup> Idem.

<sup>4389</sup> Idem.

<sup>4390</sup> Ibídem.

<sup>4391</sup> Índice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año 1812 (Buenos Aires: Imp. La Tribuna, 1859), I, 324.

<sup>4392</sup> Pedro de Vargas vendió en 1726 a Martín de Trigo un negro bozal llamado Mateo, de 27 años, en \$250, con la aclaración que "...lo tengo en la Real Cárcel" (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.72, fs.325). El Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez otorgó un poder en 1764 a Melchor del Arco para vender un mulato Andrés, de 30 años, que

"...estándome sirviendo se me escapó para la provincia del Tucumán de ay para la de arriba y siendo coxido en Cochabamba se le traxo y puso en la cárcel de dicha Villa de Potosí donde está arrestado" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1764/1765, fs.285v.).

El Dr. Juan Cayetano Fernández de Agüero otorgó en 1773 al hacendado Francisco Antonio Díaz, reciente propietario de la estancia de Santa Catalina, un poder para cobrar de manos de Juan Antonio de Merlo el negro Jacinto "...que se halla preso en la cárcel de Córdoba" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1773, fs.340v.). Agustín Rodríguez, vecino de Buenos Aires, otorgó en 1792 otro poder al Lic. Feliciano Chiclana para recaudar el negro Claudio "...que se halla en Montevideo en poder de Manuel Pérez por haberlo sacado este bajo fianza de aquella cárcel" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1792, fs.170). Salvador Escolá, vecino de Buenos Aires, otorgó en 1801 un poder a Alonso Araujo, vecino de Santiago del Estero, para recaudar al negro Marcelino, "...que se halla de mi orden para seguridad en la Real Cárcel de Santiago" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.32v.). El mulato sastre Juan, de 30 años, a quien por huidor Custodio Márquez Olivera lo tenía "...puesto a jornales entre los presos de la obra del muelle desta ciudad y con otros se halla en Martín García", fué hipotecado en 1804 a favor de Joaquín Francisco de Silva (AGN, Protocolos, Reg.2, 1804, fs.376). Y Atanasio Arrieta, vecino de Buenos Aires, otorgó en 1809 un poder a Vicente Roldán, vecino de Santa Fé, para cobrar y recoger el negro Francisco, "...el cual se halla preso en la cárcel de Santa Fé" (AGN, Protocolos, Registro 7, 1809, fs.245). Ana María Delgado, otorgó en 1759 un poder a B. Quintana, vecino de Corrientes, para vender la mulata Catalina Petrona "...la que tengo noticia se halla asegurada en dicha ciudad [en la Real Cárcel] por conocimiento y a instancias de Nicolás Alvarez Gutiérrez" (AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, fs.385v.). Y en la misma Corrientes, en 1787, Alonso Martín, vecino de Buenos Aires, otorgó un poder al vecino Bernabé Antonio de la Cuesta "...para cobrar el mulato Gregorio de 28 años, fugitivo y preso en Corrientes" (AGN, Protocolos, Reg.2, 1787, fs.453).

<sup>4393</sup> Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

<sup>4394</sup> Venta de Catalina Quintana a José Ferreyra, en \$150, que hubo por compra a Blas Sayal (AGN, Protocolos, Reg.1, 1787, fs.255).

<sup>4395</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.128, Exp.4, fs.6v.

<sup>4396</sup> Ibídem.

---

<sup>4397</sup> Ver en AGN, los expedientes correspondientes a fugas de presos de Montevideo en 1786, 1789 y 1792 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.171, Exp.9; Leg.104, Exp.5; Leg.171, Exp.11; y Leg.189, Exp.10); de Santa Fé en 1788 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 171, Exp.13); de Santiago del Estero en 1790 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.62, Exp.21; y de Jujuy en 1801 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.95, n.46).

<sup>4398</sup> José Ariza a su hijo Agustín Ariza, Córdoba, 17-I-1803 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1803, fs.55v.).

<sup>4399</sup> *Ibidem*.

<sup>4400</sup> *Ibidem*.

<sup>4401</sup> Poder librado por Domingo Piñeiro a Alexandro Pazos (AGN, Protocolos, Reg.5, 1812, fs.228).

<sup>4402</sup> Poder de Antonio Francisco a favor de Antonio Moreno (AGN, Protocolos, Reg.3, 1759, fs.25v.).

<sup>4403</sup> Poder librado por Juan de Serna y Ville a favor de Agustín de Rocha, vecino de Mendoza (AGN, Protocolos, Reg.5, 1794, fs.201v.).

<sup>4404</sup> Poderes librados por Ignacio Justo de Jibaja, primero a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego a favor de Juan Tello de Meneses, vecino de San Juan (AGN, Protocolos, Reg.3, 1725, fs.302v.; y Reg.3, 1727, fs.376).

<sup>4405</sup> Poder librado por Francisco Gutiérrez Carvajal a favor de Francisco de la Rosa (AGN, Protocolos, Reg.2, 1720, fs.941).

<sup>4406</sup> Venta de Miguel de Tagle a Manuela Moreyra en \$390 (AGN, Protocolos, Reg.1, 1781, fs.361v.).

<sup>4407</sup> Venta de Domingo Malde, apoderado de Simón de Gorordo, vecino de Córdoba, a Manuela Matos, en \$250 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1810, fs.160).

<sup>4408</sup> Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

<sup>4409</sup> Venta de Antonio Posiga a Mauricio Berlanga (AGN, Protocolos, Reg.3, 1800, fs.362v.).

<sup>4410</sup> ver Genovese, 1976, 646-647; y Mullin, 1972.

<sup>4411</sup> Poder librado por Juan Gómez de Vera a favor de Pablo Barragán, el mozo (AGN, Protocolos, Reg.2, 1722, fs.1315v.).

<sup>4412</sup> Poder librado por José de Lima, vecino del Puerto de las Conchas, a Antonio José Bas (AGN, Protocolos, Reg.6, 1778, fs.283).

<sup>4413</sup> Poder librado por Magdalena Pimienta, viuda de Lorenzo Patrón, a favor de José Tarragona, vecino de Santa Fé (AGN, Protocolos, Reg.5, 1790, fs.276).

<sup>4414</sup> Poder librado por Juan Palomeque a favor de Roque Bugado (AGN, Protocolos, Reg.2, 1789, fs.34).

<sup>4415</sup> Poder librado por Vicente Echebarría a Juan Luis Yviri, vecino del Tucumán (AGN, Protocolos, Reg.5, 1786, fs.158).

<sup>4416</sup> Venta de José León Barua, apoderado de María Josefa Cavallero Bazán, vecina de Villa Rica, a Juan José Abalos, en \$215 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1773, fs.212v.).

<sup>4417</sup> Poder librado por Bernardo Santos de Perdigón a favor de Manuel Pardo y de Juan Francisco Alvarez Guzmán (AGN, Protocolos, Reg.4, 1755/58, fs.356v.).

<sup>4418</sup> Poder librado por José de Lima, vecino de los Arrecifes, a favor de Pablo Pereyra, en la otra banda

---

(AGN, Protocolos, Reg.1800, fs.271).

<sup>4419</sup> Ver Molinari (1963) y Sales de Bohigas (1974).

<sup>4420</sup> Joseph, 1990, 10.

<sup>4421</sup> ver Becker, 1963, 1964.

<sup>4422</sup> ambos confeccionados sobre la base de numerosos casos relevados de los expedientes de la Real Audiencia de Buenos Aires, existentes en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

<sup>4423</sup> Flores Galindo, 1984, 120.

<sup>4424</sup> Price (1981) trae al respecto una nutrida bibliografía. Entre los referidos al cimarronaje se destacan los de Deschamps Chapeaux (1969) e Iduate (1982) para Cuba; el de Patterson (1981) para Jamaica; el de Beckles (1984) para Barbados; los de Picó (1986), Sued Badillo y López Cantos (1986), y Rivera (1991) para Puerto Rico; los de Mullin (1972), Genovese (1976), Windley (1983) y Finkelman (1988) para los Estados Unidos; el de Plá (1972) para el Paraguay; los de Kápsoli (1975) y Flores Galindo (1984) para el Perú; los de Vilela Santos (1983) y Reis (1986) para el Brasil; el de Magallanes para Venezuela (1972); y los de Arrazola (1970), Borrego Plá (1973), Paz Rey (1980) y McFarlane (1990) para Colombia; y entre los referidos al bandolerismo rural y la desertión militar se destacan los de Schwartz (1989), Pérez (1989), Salvatore (1989), Joseph (1990) y Slatta (1987, 1991). Varios de estos trabajos me han sido imposible consultarlos, desde Buenos Aires.

<sup>4425</sup> Entre las supersticiones más divulgadas, figura la del familiar, personaje simbólico que representa al bandolero al servicio del patrón (Rosenberg, 1936; Molina Téllez, 1947; Jacovella, 1959; Jijena Sánchez, 1952; Vidal de Battini, 1960, 1980; y Fortuny, 1974).

<sup>4426</sup> Learte, 1926, 171. Debo agradecer la copia de esta fascinante autobiografía a mi colega y amigo Gregorio Caro Figueroa.

<sup>4427</sup> el abuelo materno del historiador Ramón J. Cárcano era Francisco Marcos César y Montenegro, del Departamento de Sobremonte, al norte de la provincia, lindando con Santiago del Estero (Lazcano Colodrero, II, 195). Su parentesco con nuestro hacendado ultimado no lo he podido confirmar.

<sup>4428</sup> Se le acusaba de haber cometido una serie de muertes. El Juez Mariano Usandivaras, en oficio al Gobernador, dice que el reo "...dijo que la muerte que se le atribuía haber hecho en la persona de Santiago César era falso, y que había justificado haber muerto del chucho en la Sierra del Valle, como lo sabía por habérselo dicho José Rosa Mancilla, que vive en la jurisdicción de Santiago del Estero en el paraje nombrado Los Talas, negando las demás muertes y diciendo que Carlos Vivar fué a quitarle la vida a su casa como lo había probado" (Oficio de Mariano Usandivaras al Gobernador, 1801, AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.235, Exp.51).

<sup>4429</sup> AGN, División Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey. 1790-1794, Documento N.476; y Tribunales, Leg. 235, Exp.51; y Leg. 39, Exp.8.

<sup>4430</sup> Real, 1957, 74.

<sup>4431</sup> Halperín Donghi, 1979, 215; citado por Rodríguez Molas, 1982, 123.

<sup>4432</sup> Ver notas del Ministerio de Guerra y Marina al Ministerio de Gobierno, de 1834 (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.49, Exp.49).

<sup>4433</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1808, fs.108.

<sup>4434</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1813, fs.8.

<sup>4435</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.34, Exp.1207.

---

<sup>4436</sup> actitud señalada por Hunold Lara, 1988, 235.

<sup>4437</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28.

<sup>4438</sup> Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciano de Lima (FB, IV, 52).

<sup>4439</sup> marido de Catalina Sambrano, hija del Alferez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305).

<sup>4440</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28.

<sup>4441</sup> *Ibidem*.

<sup>4442</sup> Albores, Mayo y Sweeney, 1987, 10.

<sup>4443</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17.

<sup>4444</sup> Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer de Estéban Montenegro, Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo (Calvo, 1938, III, 233).

<sup>4445</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17.

<sup>4446</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v.

<sup>4447</sup> dueño de la estancia de Yacanto; marido de Josefa Gutiérrez, hija del Alferez Francisco Gutiérrez y de Luisa de Ledesma; y abuelo del Juez Pedáneo de San Javier Francisco Javier Barbosa Núñez (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37-38).

<sup>4448</sup> Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37.

<sup>4449</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.118v.

<sup>4450</sup> donada conjuntamente con 22 piezas de esclavos por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo (Espejo, 1954, I, 115). Debo esta referencia a la generosidad de mi colega mendocino, el Prof. Luis Coria. El nombre de Carrascal habría obedecido al hecho de ser un sitio o monte poblado de carrascas o encinas, con cuyas maderas se habrían fabricado en ese entonces los barriles para el transporte del aguardiente.

<sup>4451</sup> Verdaguer, 1931-32, I, 122-129. Los religiosos de esta Orden se caracterizaron en Chile durante el siglo XVII por ser "...los sepultureros y legatarios universales de los Lisperguer", familia a la que pertenecía la "Quintrala", o Catalina de los Ríos y Lisperguer, famosa por las crueldades con que sometía a sus siervos y esclavos (Vicuña Mackenna, 1877, 1972, 60).

<sup>4452</sup> Si bien Martínez (1969) menciona esta industria como existente en Cuyo, no registra a este Convento como el principal productor de cerámica (Martínez, 1969, 145).

<sup>4453</sup> marido de María Josefa Videla, hija del ex-Corregidor Francisco Videla y Aguiar y de Petrona Correa de Saa (Calvo, IV, 334).

<sup>4454</sup> Masini Calderón, 1979, 192 (Debo la referencia de este autor a la generosidad de mi colega Pablo Lacoste).

<sup>4455</sup> natural de Santiago de Chile, hijo de Diego Amaro Fernández de Almoguera y de Doña Ana de Ocampo (Espejo, 1954, I, 126).

<sup>4456</sup> hija de Juan de Coria Bohórquez y de Isabel Quixada (Espejo, 1954, I, 126; y Maza, 1991, 70).

---

<sup>4457</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.77, Exp.2.

<sup>4458</sup> Azara afirmó que los esclavos negros buscaban el matrimonio con mujeres libres, por lo general mulatas, "...para que los hijos nacieran libres" (Plá, 1972, 91). Esta afirmación de Azara era conocida en el resto de América. En 1574, el Virrey de Nueva España Martín Enríquez escribió al Rey que "...los negros prefieren casarse con mujeres indígenas que con negras, de manera que sus hijos nacerán libres" (Cartas de Indias [Madrid, 1877, 299], citado por Davidson, 1981, 83).

<sup>4459</sup> nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido de Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chenaut (Morales Guiñazú, 1939, 226).

<sup>4460</sup> nombradas Corvalán de Castilla, Martínez de Rozas y Sotomayor (Comadrán Ruiz, 1962, 53-54).

<sup>4461</sup> para ese entonces era Prior Fr. Miguel García de San Roque, de quien la obra de Verdaguer (1931-32) no trae referencia alguna.

<sup>4462</sup> La Estrella era una aldea del Departamento de San Fernando, a 15 km. del río Rapel (Asta-Buruaga y Cienfuegos, 1899, 270).

<sup>4463</sup> Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

<sup>4464</sup> hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

<sup>4465</sup> marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

<sup>4466</sup> Masini Calderón, 1979, 191.

<sup>4467</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.77, Exp.2, fs.85.

<sup>4468</sup> hijo de José Ignacio Andrade, nacido en Santiago de Compostela, Galicia, y de Juana Josefa Díaz Perafán (FB, I, 117). Estudió en Charcas (Cutolo, 1963, 36).

<sup>4469</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg., Exp.2, fs.149v.

<sup>4470</sup> *Ibidem*.

<sup>4471</sup> *Ibidem*.

<sup>4472</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v.

<sup>4473</sup> En efecto, los mulatos José Chacón y Santiago Reinoso, de 30 y 20 años respectivamente, fueron vendidos en Buenos Aires en 1753 a María Antonia Batallanes y Juan Ferreyra (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.84, fs.248 y 194). El mulato José, de 25 años, fué adquirido en 1756 por Baltasar de Sustaeta (AGN, División Colonia, Sala IX, t.87, fs.99v.). El mulato Juan, de 30 años, fué vendido en 1768 a José de Tavora (AGN, Protocolos, Reg.1, 1768, fs.11). Los mulatos Santos, Benedicto y Simón, de 34, 60 y 58 años respectivamente, fueron vendidos en 1780 a Ramón José de Almandós por su Vicario, el R.P. Manuel Oteisa (AGN, Protocolos, Reg.4, 1780, fs.191). El mulato Melchor Romero, de 25 años, fué adquirido en 1783 por Antonio José de Escalada (AGN, Protocolos, Reg.4, 1782/83, fs.285v.). Los mulatos Juan, de 30 años, y Ramón Barela fueron vendidos en 1790 a Manuel Martínez y Rafael Bargas (AGN, Protocolos, Reg.3, 1790, fs.161 y 135v.). El mulato Juan Lisón fué manumitido en 1795 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1795,

---

fs.429). El mulato Lorenzo, de 13 años, fué vendido en 1796 a Juan Camely, vecino del Rincón de San Pedro (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796, fs.291). Y el mulato José Guzmán fué manumitido en 1797 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v.).

<sup>4474</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.43.

<sup>4475</sup> Hijo de Domingo Reje Corvalán y Chirinos y de María Manuela Sotomayor y Videla, casado en primeras nupcias en 1800 con Benita Merlos y Basavilbaso, y en segundas nupcias con Manuela Ramos Mexía Ross (FB, II, 171)..

<sup>4476</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.55.

<sup>4477</sup> Lockhart, 1968, 188.

<sup>4478</sup> abarcaba desde Nono hasta la jurisdicción de la Punta.

<sup>4479</sup> Según Price (1981) para que las comunidades cimarronas fueran viables debían estar localizadas en lugares inaccesibles (Price, 1981, 15).

<sup>4480</sup> Archivo Parroquial de Villa Dolores (Barrionuevo Imposti, 1949, 732).

<sup>4481</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.8, fs.24v.

<sup>4482</sup> Cabrera, 1930, 13.

<sup>4483</sup> Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1758.

<sup>4484</sup> Cabrera, 1930, 13; y Punta, 1988.

<sup>4485</sup> Hijo del Alcalde y Regidor Maestre de Campo Fernando de Garay y Ramírez Tello y de Josefa María de Torres y Salguero de Cabrera, y hermano de Bartolina Rosa de Garay y Tejeda, mujer de José Santiago de Echenique y Cabrera. Estaba casado con María Francisca de Molina Navarrete, hermana de María Josefa de Molina y López del Barco, mujer de Juan Agustín de Echenique y Cabrera; y fué padre del Alcalde Provincial Domingo Garay, célebre por las tropelías que cometiera con la población campesina, casado con Isidora Zamudio y Echenique, de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, de Fernando Garay, de Teresa Garay, mujer de José de Ariza, y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

<sup>4486</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>4487</sup> hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera. Juan Agustín estaba vinculado con la Casa de los Molina Navarrete pues era casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; sobrina de Luis Molina Navarrete, casado con Isabel Garay y Peralta; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer de

---

Francisco Garay (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (Allende Navarro, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (Calvo, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (Lazcano, II, 205).

<sup>4488</sup> AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

<sup>4489</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.210, Exp.5, fs.38-55.

<sup>4490</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122.

<sup>4491</sup> "Relación que manifiesta el estado actual de la Provincia-Intendencia de Córdoba", La Revista de Buenos Aires (Buenos Aires), año VIII, 1870, n.83, t.21, 535. Debo la referencia del original de esta pieza a mi colega el Prof. Chamosa.

<sup>4492</sup> Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa Fé, y de María Polonia Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última cuando enviuda vuelve a casar con José de Allende y Losa. Su madre era hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, hermana de María Isidora Ascasubi, mujer del General José de Allende y Losa, prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN, 1967, 87). María Polonia era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas.

<sup>4493</sup> Antonio Arredondo al Gobernador-Intendente, Córdoba, 12-X-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.10, 1798-99, Sala IX, 5-10-5).

<sup>4494</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122. En 1796, de un total de 93 aprehendidos, uno de esos presidiarios, Pedro Gaete, dió parte que los 60 presos traídos de Córdoba, intentaron fugarse, premiándose con el indulto (Oficio del Alcalde de Primer Voto Juan Agustín Videla y Aguiar al Virrey, Buenos Aires, 2-III-1796, AGN, División Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, 1795-1796, Documentos N.577 y 578). Hasta el momento me ha sido imposible localizar el destino final de estos presos, aunque Sobremonte declara destinarlos a los bajeles correspondientes a la Escuadra de mar que recalaba en Montevideo. Nada se dice de los otros 33 presos aprehendidos en Córdoba que no fueron remitidos a Buenos Aires.

<sup>4495</sup> En España, los destinos de los condenados fueron antes del siglo XVIII las galeras, y en el siglo XVIII las minas de Almadén, las plazas fuertes del norte de Africa (Orán, Melilla, Ceuta y Larachi), los puertos de La Havana, San Juan de Puerto Rico y Veracruz, los arsenales del Ferrol, Cádiz y Cartagena, y las obras públicas (el Canal Imperial, el de Murcia y el de Guadarrama) (Fernández, 1991, 24).

<sup>4496</sup> Así ocurrió primero el 19 de febrero con José Centurión, quien al mes falleció; el 26 de igual mes con Manuel Aguilera Garay; el 3 de marzo con Pedro Juan Carnero; el 14 de igual mes con Bernardo Rearte; y el 27 de marzo con Nicolás Jaymes (AGN, División Colonia, Justicia-Real Cárcel, 1761-1807 [Sala IX, 26-7-12]). En las Visitas de Cárcel practicadas en Buenos Aires entre 1764 y 1783 se registran las nóminas de numerosos presidiarios, con detalle de sus delitos y demás circunstancias del crimen (ver AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.20).

<sup>4497</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.229, Exp.21, fs.32-35v.; y Leg.240, Exp.19, fs.31-35v., y 48-51v..

<sup>4498</sup> El Dr. Agustín Pío de Elía denuncia en 1795 la invasión del Puesto de Santa Ana, en Yapeyú (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.173, Exp.2, fs.85-94v.).

---

<sup>4499</sup> Un estanciero de Las Vívoras, apellidado Antúnez, fuè procesado por complicidad con bandoleros (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.61, Exp.1; y Leg.173, Exp.1, fs.16-21, 30-32, y 77-92v.).

<sup>4500</sup> Ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.3.

<sup>4501</sup> acerca de esta guerra ver Mariluz Urquijo, 1988, 437-464.

<sup>4502</sup> AGN, División Colonia, Expedientes, 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs.146v.

<sup>4503</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.D-1, Exp.7, fs.58-60. El episodio relatado en este expediente ocurrió en 1714.

<sup>4504</sup> hijo de Francisco Pacheco y Cevallos y de Joaquina Camacho Narvona, marido de Dionisia Obes; y consuegro de Benito Chain. Este militar Oriental lleva consigo el dudoso honor de haber sido quien por vez primera utilizó el "enchalecamiento" (Pereira, 1893).

<sup>4505</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.

<sup>4506</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.

<sup>4507</sup> Cardozo, 1959; y López, 1976.

<sup>4508</sup> AGN, División Colonia, Bandos, Libro 2, fs.20 y 21.

<sup>4509</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2.

<sup>4510</sup> Garavaglia, 1984, 26.

<sup>4511</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2. Antonio Cattani a Pedro de Cevallos, Campamento de Santa María, Estancia de San Luis, 1-XII-1762 (AGN, División Colonia, Sub-Inspección, 1762-1784, Sala IX, 28-6-2); y AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4. El Capitán Bernardo Ríos declaró que aparte de disparárseles la caballada, "...la falta que ubo allí de tabaco también fuè parte de todos los disgustos que tuvieron, que para suplirla mascaban yerbas del campo, o rayces de pajas, de lo que resultó llagárseles toda la boca y que se mantenían por alimento por falta de bastimentos con dichas rayces, y que aún siendo la carne flaca, daba para cada sesenta hombres un toro día de por medio" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4, fs.11v.).

<sup>4512</sup> Poenitz, 1984a, 17; y 1984b, 161-162

<sup>4513</sup> Cardozo, 1959, 196.

<sup>4514</sup> Era hijastro de Juan Francisco Dehesa y Helguero, natural de la Villa de Laredo, en las Montañas de Burgos, el segundo marido de su madre Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid; marido de María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Javier de Villavieja y de Francisca Gonsález; hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 145, 101, y 35).

<sup>4515</sup> Valle de Siles, 1990, 466; Actas Capitulares de Tucumán, marzo de 1781; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp. 21, fs.94.

<sup>4516</sup> Cardozo, 1959, 197.

<sup>4517</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

<sup>4518</sup> Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiola, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su

testamento fechado el 19-V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3). Se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I., n.29]. [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]]. Pese a su prestigio guerrero logrado en la represión del alzamiento indígena de Tupac Amaru, se había desacreditado por su fallida reconquista de Maldonado de manos del Ejército Inglés y por su fuga de la costa de Montevideo cuando el desembarco de las legiones de Achmuty (Cutolo, I, 151).

<sup>4519</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

<sup>4520</sup> Pianetto, 1968, 23.

<sup>4521</sup> Cárcano, 1885, 98-103; Siri, 1945, 75-88; Bischoff, 1953, 83-89; y 1990, 37-46; y Carte, 1969, 36-45. La muerte de Santos Guayama trajo como represalia el asesinato del Gobernador de San Juan Agustín Gómez (Carte, 1969, 42).

<sup>4522</sup> Giraud, 1986; Slatta, 1991, 147; y Joseph, 1991, 168.

<sup>4523</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Leg.238, Exp.10, fs.114-133.

<sup>4524</sup> De este oficial, el General José María Paz, relata en sus Memorias, como estando preso en su cuartel, luego de la batalla de Oncativo, comentó que la anécdota sobre el caballo moro que recriminó a Quiroga la participación en la batalla resistiéndose a ser montado fué real (José María Paz, Memorias, capítulo XVI). Cutolo asigna por error como padres de Manuel Güemes Campero a Manuel Güemes y Gómez y Manuela Güemes y Martierena del Barranco (Cutolo, III, 475).

<sup>4525</sup> Scott, 1985, 244.

<sup>4526</sup> Fuerte ubicado a la orilla izquierda del Río Segundo, que remonta sus orígenes a 1727 (Rázori, II, 305).

<sup>4527</sup> nieto de José Alvarez y de Josefa Ladrón de Guevara.

<sup>4528</sup> desconozco de quién fué hijo, pero de seguro es sobrino de Felipa Catalina Ladrón de Guevara, mujer de José Rodríguez; de Josefa Ladrón de Guevara, viuda de José Alvarez; y nieto de Juan Ladrón de Guevara y de María Ferreyra Cabrera (Moyano Aliaga, 1973, 14). Probablemente sea bisabuelo del dirigente Socialista Cordobés José Guevara, asesinado por los Conservadores en la década del 30, y tatarabuelo de Ernesto Guevara Lynch, más conocido como el "Che" Guevara. No descarto que el historiador Cordobés Ceferino Garzón Maceda, quien sin duda conoció este expediente así como al Che en su juventud, le haya transmitido a este último esta referencia.

<sup>4529</sup> Mariano Rodríguez, Juez Cuadrillero del Partido del Tío, XII-1807 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.15, Sala IX, 6-1-3). Esta no es la primera vez que los miembros de la familia Rodríguez salen en defensa de sus parientes. Cuando en 1804 el Deán de Córdoba Gregorio Funes presentó una terna para cubrir la vacante de la Sacristía Catedralicia de Córdoba, al incluir en la misma a su sobrino carnal José Felipe Funes, y eliminar de la nómina al Dr. Pedro Vicente Ferreira, Cura y Vicario de la Primera Sierra y Anejos de Córdoba, el sobrino de este último, el entonces Chantre Juan Justo Rodríguez, hermano del Teniente Gobernador Victorino Rodríguez, puso el grito en el cielo. Finalmente, prevaleció la voluntad del Chantre Rodríguez, cuya madre era prima en cuarto grado del Dr. Ferreira, pues el Virrey Sobremonte, amigo del Chantre, eligió a este último, haciendo a un lado la terna elevada por el Deán de Córdoba Gregorio Funes (Altamira, 1949, 58, nota 38). Asimismo, el Teniente Gobernador Victorino Rodríguez, fué denunciado en 1796 por Doña Ubalda Sosa, mujer de Agustín Fiadas, de ser compinche del Comandante de Armas y Juez Veedor del Mineral de La Carolina Luis Lafinur, quien tuvo "...malignas intenciones...contra mi honor".

---

Dicha denuncia debió hacerla Doña Ubalda ante el Virrey Pedro Melo de Portugal, por cuanto el Gobernador-Intendente de Córdoba era

"...echura del Comandante e imponderado favorito suyo,...pues este [Lafinur] tiene en el Gobierno el favorable resorte de ser compañero del Dr. Victorino Rodríguez, balido del Sr. Gobernador y su Director privado" (Doña Ubalda Sosa al Virrey Pedro Melo de Portugal, La Carolina, 20-VI-1796 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.9, Sala IX, 5-10-4]).

<sup>4530</sup> el mismo que trasladó la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción al Tío Viejo, luego de haber sido retirada a Sunchales por una hija de Juan Ladrón de Guevara, quien la había traído de Chile o Cuyo (Cabrera, 1930, 61). El General Paz en sus Memorias se refiere a este personaje revelando que estaba entre los que él había perdonado en 1829 luego de la batalla de Oncativo, para más luego participar ingratamente de la partida que lo aprisionó. En un lugar llamado la Isla "...tuve la satisfacción de ver concluida la resistencia armada de aquellos departamentos...allí prestaron sumisión al Gobierno, tantos que se negaban a hacerlo o lo diferían astutamente, como el revoltoso Guevara y el suspicaz Comandante Isleño" (Paz, Memorias, Cap.XVIII).

<sup>4531</sup> Pianetto, 1968, 56.

<sup>4532</sup> Porque mejor se comprenda la fatiga de los carceleros, el Alguacil Mayor de Córdoba hizo presente en 1782 "...de que allí a causa de no ter las paredes del patio, la altura correspondiente de necesidad tienen continuamente en los calabozos, que no siendo estos mas que tres estrechos y los presos muchos se hallan continuamente sofocados, los de atroces delitos que son los mas, a causa de no correr las causas y que todas las noches se meten al cepo, se sacan de él por la mañana, y a una y a otra diligencia se registran con cuidado las prisiones: al mediodía y a la tarde que se les entra la comida, es necesario darle algún tiempo para desaogar la naturaleza, que como no ay allí cuerpo ninguno de guardia, necesita el carcelero tener quien le ayude pagado de su dinero. El riesgo con que estará de la vida al menor descuido, se deja bien comprender, y agregándose a esta fatiga (que es una estrecha prisión continuada) el que se le priven de aquellos derechos que el Soberano concede, por mas que se quiera aparentar, vien aclara luz se descubre, que no es otra cosa que añadir inconvenientes, para que no haya quien sirva, a menos que se quieran valer de algún picarón desalmado, que todos los días deje irse a los presos, como sucedía hasta que entraron los los Carceleros depuestos" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.262).

<sup>4533</sup> En Santa Lucía, Corrientes, 40 mujeres fueron emparedadas en 1782 por un cura, probablemente Miguel Pereira, el mismo cuya remoción pidiera en 1780 el Protector de Naturales Juan Gregorio Zamudio, en representación del Pueblo de Itatí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.22, fs.1-2; e Interior, Leg.8, Exp.4). Y en los Pueblos de Misiones, en el Puesto de Santa Ana, a comienzos de la década del 90, una compañía de gentes armadas mató a tres indios, les robó los caballos, les saqueó las casas, insultó el templo y les llevó sus mujeres (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.173, Exp.6, fs.37).

<sup>4534</sup> Hobsbawm, 1992, 80.

<sup>4535</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.173, Exp.6, fs.10v., 23, 61v., y 89.

<sup>4536</sup> Dussel, 1970, V, 104-107.

<sup>4537</sup> Cutolo, 1936, I.

<sup>4538</sup> Félix Mestre al Virrey Vértiz, Córdoba, 10-IX-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

<sup>4539</sup> Alegato del Dr. Antonio Sáenz (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.).

<sup>4540</sup> Alegato del Dr. Antonio Sáenz (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.).

<sup>4541</sup> Jose de Acosta (1952), *De Procuranda Indorum Salute* (Madrid, ed. Francisco Mateos), 403-405, citado

---

por Brading, 1991, 215.

<sup>4542</sup> hermanos de Josefa de las Casas de Guerrero, y primos hermanos del padre de Ambrosio y Gregorio Funes, y de los regidores Pedro e Ignacio de las Casas y Funes, y primos políticos del Alguacil Mayor Nicolás García Gilledo y de Marcos Ascasubi (LC, II, 1968, 142).

<sup>4543</sup> Hijo legítimo del Capitán Ignacio de Tejeda y Bravo y de Tomasa Martínez y Tejeda Guzmán. Calvo (1936) cree que del dicho Ignacio de Tejeda descende la actual familia de su apellido en Córdoba y Tucumán, sin poder precisar el entronque (Calvo, 1936, 322). Para mayor detalle de esta linajuda familia descendiente del conquistador de Córdoba Tristán de Tejeda, ver la Genealogía anónima y la discusión acerca de su probable autoría en Levillier, 1926, II, 384-385; y Luque Colombes, 1981.

<sup>4544</sup> Marido de Bartolina Rodríguez, y padre de Juan José Gil, casado con Rosa de Larreátegui (Quesada, 1983).

<sup>4545</sup> AHC, Escribanía N.3, Leg.1, Exp.8.

<sup>4546</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.14, Exp.5.

<sup>4547</sup> Acuerdos, 3a Serie, II, 396 y 410.

<sup>4548</sup> Acuerdos, III Serie, IV, 276 y 279.

<sup>4549</sup> Debien, 1981, 117.

<sup>4550</sup> hija del Cap. Juan de los Ríos Gutiérrez y de Agueda Báez de Arce, viuda de Pedro José de Sosa, y mujer de Francisco Ruiz de Quevedo (FB, V, 310)

<sup>4551</sup> AGN, División Colonia, Leg.102, Exp.6, fs.39.

<sup>4552</sup> *Ibidem*.

<sup>4553</sup> *Ibidem*.

<sup>4554</sup> AGN, División Colonia, Bandos, Libro 3, fs.103, 104, 176 y 177.

<sup>4555</sup> En algunos casos no he podido hallar aún la connotación político, económico o social del padrino. El negro ladino Manuel paraba en 1732 en manos de Bernardo Olano (Poder librado por Antonio de Ynda a favor de José de Endaya, AGN, Protocolos, Reg.3, 1732, fs.257). El mulato Juan se hallaba en 1745 "...en Cuzco en poder de José de Avellaneda" (Poder librado por Miguel Gerónimo Ruiz a favor de Juan Miguel Olleta, vecino del Cuzco, AGN, Protocolos, Reg.3, 1744/45, fs.513). El mulato portugués prófugo Joaquín paraba en 1764 en lo de José Mariano Pereira, vecino de Santiago del Estero (Poder librado por Pedro Aguiar a favor de José Martínez y Neira, AGN, Protocolos, Reg.4, 1763/64, fs.106v.). El negro fugitivo Antonio, de 28 años, paraba en 1772 según noticias "...en casa de Santiago Ramos, Río de Córdoba abajo, en el paso que llaman de Quiroga" (Poder librado por Rosa Piñero, viuda del hacendado Sebastián de Giles Cabrera, a favor de su hijo Juan Manuel Giles, en viaje a Córdoba (AGN, Protocolos, Reg.5, 1772, fs.95). Veinte años después, en 1793 el mestizo José de Inchaurrandieta, otorgó un poder a José Antonio Calderón, vecino de Asunción, para cobrar de Bernardo de la Rosa

"...el valor de un criado que le vendí en el año que se hallaba José Barbosa de Comandante en el puerto de las Conchas por cien arrobas de yerba con más un par de grillos que pesaban 22 libras" (AGN, Protocolos, Reg.5, 1793, fs.30).

El negro fugitivo Juan existía en 1805 "...en poder de Eduardo Sosa, vecino del Tucumán" (Poder librado por Juan Andrés Carrasco a favor de José Mota Lagosta, AGN, Protocolos, Reg.6, 1805, fs.493v.). Y en 1811 el negro fugitivo Silvestre paraba en poder del oriental Pedro Acosta (Poder librado por el albacea de la testamentaria de Pío Baneti a favor de Tomás Sertores, residente en Montevideo, AGN, Protocolos, Reg.7, 1811, fs.175).

---

<sup>4556</sup> Poder librado por Antonio Lobo a favor de su hijo Juan (AGN, Protocolos, Reg.2, 1708, fs.110).

<sup>4557</sup> Poder librado por Prudencia Sánchez de Loria a favor de su cuñado Alonso Fernández (AGN, Protocolos, Reg.3, 1723/24, fs.71). Manuel Noble Canelas era Alcalde Provincial de Córdoba, y fué padre de Rosa Noble Canelas y Echenique, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana, hijo de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta, naturales de Lebrija, Sevilla; y abuelo de Agustina Arana, casada en 1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

<sup>4558</sup> Poder librado por el Capitán José Reynoso a favor de Antonio Ruiz de Arellano, vecino de Asunción (AGN, Protocolos, Reg.2, 1729, fs.436).

<sup>4559</sup> Poder librado por Francisco de Merlo a favor de Francisco García Huidobro (AGN, Protocolos, Reg.2, 1735/38, fs.146).

<sup>4560</sup> Poder librado por el gallego Antonio Cuello a favor del cuyano Alejandro Suárez (AGN, Protocolos, Reg.4, 1763/64, fs.62).

<sup>4561</sup> Poder librado por María Josefa Rodríguez, viuda de Juan Santana, a favor de José Mora (AGN, Protocolos, Reg.5, 1785, fs.471).

<sup>4562</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Hacienda, Leg.36, Exp.925.

<sup>4563</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1738, fs.341.

<sup>4564</sup> Gaspar de Santa Coloma había pedido en 1789 su libertad (AGN, División Colonia, Solicitud de Presos, Libro 3, hoja 233).

<sup>4565</sup> AGN, División Colonia, Despachos y Nombramientos Civiles y Eclesiásticos, 1796, Sala IX. En Cuba eran conocidos bajo el nombre de rancheadores (Franco, 1981, 47; y Pérez de la Riva, 1981, 62); y en Bahía, Brasil por Capitanes de Monte (Schwartz, 1981, 168, nota 23, 170, nota 26, y 172).

<sup>4566</sup> con referencia a la legendaria figura del Comandante negro liberto al servicio de los blancos de Jamaica (Patterson, 1981, 203, nota 10, y 206).

<sup>4567</sup> Pascual Ibáñez de Echabarry a Antonio Olaguer Feliú, Buenos Aires, 22-II-1798 (AGN, División Colonia, Comandancia General de Armas, Leg.2, Sala IX, 1-8-3).

<sup>4568</sup> Venta del Pbro. Vicente Pesoa a favor de Dionisio Ortega (AGN, Protocolos, Reg.3, 1782, fs.287v.).

<sup>4569</sup> Venta de María Encarnación Pesoa, viuda de José Alexandro de la Cruz, a favor de José Marul en \$250 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1802, fs.494).

<sup>4570</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, 1760-61, fs.399v.

<sup>4571</sup> Contra el colonial-mercantilismo puede consultarse el alegato del Dr. Juan Manuel de Labardén, en Wedovoy (1955) y Marquiegui (1986)..

<sup>4572</sup> ver Saguier, 1992.

<sup>4573</sup> Para el caso de las contradicciones que mantuvieron en el Bajo Perú los campesinos con los sacerdotes, los funcionarios de la corona, y los terratenientes, ver Reyes Flores (1983). Si bien este autor incurre en una suerte de esencialismo campesinista, la información primaria proveída por su obra es original y valiosa. Llama la atención que no sea citado por Stern (1990), ni tampoco en el debate acerca del origen ideológico de Sendero Luminoso publicado en 1992 por Allpanchis.

---

<sup>4574</sup> "Fuera de que el efecto del Aguardiente es tan útil y necesario en esta Villa que sin él cesará indefectiblemente el trabajo de la Rivera, pues de él se sacan crecidos miles al cabo del año del Ramo de la Sisa que además del Real Derecho de Alcabalas paga el aguardiente regular a 20 reales por carga, destinado su producto para composición de Lagunas, cañadas, puentes, y otras obras públicas, como es notorio y a nadie se le esconde esta verdad, y siendo constante que gravándose con nuevos derechos tal vez o el mísero traficante o el que cosecha sus plantas viendo su poca o ninguna utilidad abandonará cuidar sus plantas o conducir este efecto, no es claro que hallándose sin composición, las lagunas destruidas, y aniquiladas estas por defecto de fomentos cesará la Rivera en la molienda de sus metales por la carencia de la agua tan precisa y necesaria para dicho efecto?...".(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 9, Exp. 153, fs. 3v.).

<sup>4575</sup> En el caso de Antioquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de McGreevey (1975) y López Toro (1970), opinaron que la minería del oro proveyó en el siglo XVIII a algunos antioqueños con suficiente capital líquido como para sostener un patrón de inversiones diversificadas y un comportamiento empresario transformador (Twinam, 1977, 1-3). En igual sentido opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la alegada pobreza y atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto de las posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42).

<sup>4576</sup> Buechler, 1989, 19 y 340.

<sup>4577</sup> Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

<sup>4578</sup> Arzáns de Orsúa y Vela, 1965, II, 472; y III, 338.

<sup>4579</sup> Lira Montt, 1974, citado por Ruiz Moreno, 1989, 242, nota 18.

<sup>4580</sup> Dueño de cuatro labores y tres ingenios, uno de los cuales era el Ingenio Agua de Castilla. Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710; hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en Cuzco; y padre del II Conde de Casa Real de Moneda Felipe Lizarazu; de María Josefa Lizarazu, dueña del Ingenio San Diego, mujer del Administrador de la Aduana de Potosí José de Linares (padre del Dictador Linares); de Juana Lizarazu, dueña del Ingenio Agua de Castilla, mujer del ex-Corregidor de Lampa y futuro Concejero de Indias Vicente Hore Dávila; y de María Lizarazu, dueña del ingenio Canteros, mujer de Joaquín de la Quintana (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120; y Buechler, 1989, 327-332).

<sup>4581</sup> Dueño del Ingenio Laguacaio. Concuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán. Lo heredan su mujer Bárbara de la Quintana; y Antonia de la Quintana, mujer del Oidor de la Real Audiencia de Charcas José Giráldez y Pino, y a éste último lo hereda Estéban Giráldez San Merino (Tandeter, 1980, 383; Morales, s/f; y Buechler, 1989, 336). A Bárbara de la Quintana la hereda Alejandra de la Quintana, quien a su vez es heredada por Joaquín de la Quintana (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

<sup>4582</sup> Dueño del Ingenio Chaca. Hijo de Miguel de Otondo y Josefa de Monroy. Por ser su

---

madre prima hermana de María Josefa Alvarez de Quirós, mujer de Juan de Santelices, I Marqués de Santa María de Otavi, este último lo designa como su heredero. Joaquín José de Otondo casó con Josefa Ezcurrechea, hija del fracasado Mercader de Plata Miguel Antonio de Ezcurrechea y de Micaela de Ondarza; y fué padre de Ildefonsa Otondo, mujer de Francisco Trigosa, y de Felipa de Otondo, mujer de José Ignacio Lapeyra y Zabaleta (Tandeter, 1980, 243-245, y 258; y Buechler, 1989, 325-326).

<sup>4583</sup> Dueño del Ingenio Jesús María. Hijo de Gabriel de Herboso y de Francisca de Astoraica y Herboso; y nieto del Corregidor Matías Astoraica y de Catalina de Herboso (Buechler, 1989, 336, nota 206). Sobrino de José de Herboso y Figueroa, heredero a su vez del Visitador Joaquín Herboso (ver Quesada, 1997).

<sup>4584</sup> Es preciso señalar como lo hace Cornblit (1972) que existían dos clases de corregidores, los de pueblos de indios y los de ciudades de españoles (Cornblit, 1972, 123, nota 54).

<sup>4585</sup> Entre ellos se destacaron Juan Bautista Alquisalete con seis operaciones por valor de \$139.207; Mariano de Antesana con seis operaciones por valor de \$113.420; Baltasar de Arandia con veinte operaciones por valor de \$101.927; Felipe Santiago de Arze con siete operaciones por valor de \$128.626; Baltasar de Asevey con trece operaciones por valor de \$183.060; Juan Antonio Baquero con veinte operaciones por valor de \$213.500; Miguel de Bulúcuá con dos operaciones por valor de \$124.284; Roque Burrugorri con una docena de operaciones por valor de \$157.183; José Canales con una decena de operaciones por valor de \$116.054; Juan y Bartolomé Echegoyen con catorce operaciones por valor de \$129.336; Manuel Fernández de Alonso con una veintena de operaciones por valor de \$198.211; Alfonso Guzmán y Mendoza con nueve operaciones por valor de \$115.917; Juan de Ibieta y Endeiza con una docena de operaciones por valor de \$105.131; Agustín de Iriondo 79-95 con 18 operaciones por valor de \$227.663; Francisco Antonio Lezama con una operación por valor de \$108.839; Juan Lizarazu con una docena de operaciones por valor de \$144.432; Gabriel José de Matos con una quincena de operaciones por valor de \$204.194; Luis Antonio de Oliveros con ocho operaciones por valor de \$104.902; Gregorio de Otárola con nueve operaciones por valor de \$105.897; Domingo de Paz con media docena de operaciones por valor de \$131.119; Francisco Prieto de Quevedo con una docena de operaciones por valor de \$111.071; Bartolomé Jacinto de Quiroga con una treintena de operaciones por valor de \$353.436; Calisto Rodríguez Torres con una operación por valor de \$321.098; José Ruiz de Arellano con una decena de operaciones por valor de \$108.200; Miguel Uribarri con dos operaciones por valor de \$104.814; y Juan Vicente de Vetolasa con más de una docena de operaciones por valor de \$209.296.

<sup>4586</sup> Cañete, 1952, 197.

<sup>4587</sup> *Ibíd.*

<sup>4588</sup> *Idem*, 196.

<sup>4589</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3121.

<sup>4590</sup> Bakewell, 1986, 7.

---

<sup>4591</sup> a diferencia de Potosí donde se practicaba por fuego y copella o por la vía húmeda con aguas fuertes o regia (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 6v. Ver Cañete, 1952, 191).

<sup>4592</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 7v.

<sup>4593</sup> Idem.

<sup>4594</sup> Idem.

<sup>4595</sup> Idem.

<sup>4596</sup> Idem, fs. 12.

<sup>4597</sup> Cañete, 1952, 147. En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí se abonaba a 146 pesos (Cañete, 1952, 127).

<sup>4598</sup> Idem.

<sup>4599</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 1.

<sup>4600</sup> AGN, Sala IX, 27-4-6.

<sup>4601</sup> Idem.

<sup>4602</sup> Saguier, 1990, 26, 27, 33, y 36.

<sup>4603</sup> De la nómina de los mismos, existente en los Manuales de Décimos, pude hallar un sólo comerciante (Juan de la Plaza) que hubiera previamente trajinado mercaderías en Buenos Aires (AGN, Sala XIII, Oruro, Leg. 24, Exp. 18).

<sup>4604</sup> Cañete, 1952, 186.

<sup>4605</sup> Vargas Ugarte, 1956, 236, cit. por Hidalgo, 1987, 215. El Cabildo de Cochabamba, integrado por el Alcalde de Primer Voto José de Arias Argüello, el Alférez Real y Alcalde de Segundo Voto Juan José Uzieda y González, el Regidor Decano Pedro del Zerro y Somano, el Depositario General Domingo de Arias Argüello, y los Regidores Manuel Balentín Gutiérrez y Francisco Gumucio y Astuena y el Procurador General Nicolás José Montañó, hacían presente en 1778 al Gobernador "...los graves e insoportables perjuicios que los Corregidores con la intendencia de sus Repartos infieren a toda clase de personas, ya en obligarles con violencia a recibir excesiva cantidad de efectos que no necesitan, ya en el cobro de sus intereses antes del término concedido, y ya obligando a otros, de propia autoridad, a que involuntariamente sean sus cobradores, sin que tengan estos infelices otro consuelo en sus recibidos Bexámenes, que el de esperar sus desagrazos en la Residencia de los expresados Corregidores, como que a ella están obligados por Leyes y repetidas Cédulas Reales, pero aún esta esperanza y la de que el Rey Nuestro Señor sea sabidor de lo que padecen estos sus miserables remotos basallos, se les frustra y sale bana a causa de no cumplirse lo que S.M. tiene tan reencargado de que ninguno salga del distrito de su gobierno sin que aia dado Residencia" (AGN, Sala IX, Interior, Leg.4, Exp.13).

<sup>4606</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 882, acápite 22

---

<sup>4607</sup> El azoguero Coronel Juan de Peñarrubia, confesaba en su testamento que para habilitar el giro de sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como su hija natural, María Enríquez (críada y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso secretamente a librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxiliosancieros, obligándolo así a recurrir por vez primera al Banco de San Carlos. Peñarrubia era casado con Juana Guriguru; hermana de Juana Guriguru, mujer del Teniente de Dragones Pedro Escribano Salvado, nacido en Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; y el mismo era tío político del Capitán de Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de Pedro Escribano Salvado y de María Guriguru o Burburu; del Alférez del Presidio Cayetano Grimau, casado en primeras nupcias con María Antonia Escribano Guriguru, y en segundas nupcias con María Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycoechea; y de Mercedes, mujer del Ministro Contador de la Factoría de Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59; y Fernández de Burzaco, 1986-90, II, 293; y III, 195 y 288).

<sup>4608</sup> Ver diferentes ejemplos en Saguier (1989b).

<sup>4609</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

<sup>4610</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

<sup>4611</sup> Idem.

<sup>4612</sup> Ver Saguier, 1991, 117-172.

<sup>4613</sup> Había sido socio de Manuel de Bulúcu (Buechler, 1989, 419). Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco, habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel, la Orden de Caballero de Montesa y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187).

<sup>4614</sup> Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

<sup>4615</sup> Saguier, 1989a, 313-316.

<sup>4616</sup> Buechler, 1989, capítulo VI; Saguier, 1989b, 69-81; y Tandeter, 1991, 35-72. En este último trabajo, Tandeter me cita no en su estado de la cuestión sino tan solo para tergiversarme, al atribuirme haber afirmado que la epidemia de 1804 fué provocada por la

---

peste bubónica, cuando en realidad yo menciono esta última peste sólo a título presuntivo (Tandeter, 1991, 65, nota 115). Más luego, en su reciente libro, Tandeter (1992) omite totalmente la mención de dicho trabajo y de otro mas de mi autoría publicado en 1991 en ANDES, Antropología e Historia (Salta: CEPIHA y Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta), n.2-3, titulado "Los Cálculos de Rentabilidad en la Crisis de la Azoguería Potosina. El Refinado del Metal a la luz de ocho Visitas de Ingenios desconocidas". En dicho libro Tandeter reitera, en sus Cuadros 16 y 18, los errores señalados por mí en la Tabla 17 de su tesis doctoral. En efecto, Tandeter (1992) toma el número de indios por punta o equipo de semana en lugar del número total de indios o gruesa estipulados a cada ingenio (Tandeter, 1992, 166 y 171). Los errores en el levantamiento de los datos lo llevan a Tandeter a equivocarse en su Cuadro 16 la valuación del contingente mitayo semanal de cada uno de dichos ingenios (columna 4) y la tasación total de cada uno de los mismos (columna 5); y en su Cuadro 18 los porcentajes que los arrendamientos significaban tanto sobre el valor total de dichos ingenios (columna 3), como sobre el valor estimado de los mitayos (columna 6). Para mas datos ver Saguier, 1991, 139.

<sup>4617</sup> Buechler, 1973, 55-60.

<sup>4618</sup> Tomo prestada esta acertada figura retórica de Hillcoat y Quenan, 1987, 46.

<sup>4619</sup> Buechler, 1977, 92.

<sup>4620</sup> Manuel José Vélez al Virrey, Buenos Aires, 9-VIII-1803, (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 116, Exp. 2963, fs.101).

<sup>4621</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3094, fs. 30v.

<sup>4622</sup> Cañete acostumbraba citar ejemplos de la antigüedad clásica para replicar a sus adversarios. En oportunidad del litigio surgido con motivo de la testamentaria del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete advierte que "...imitaría yo sin violencia a Antígono que mandó retirar a los soldados que le murmuraban cerca de su Real Pabellón para facilitarles la libertad con la distancia. También me abanzaría a regalar al Albacea como Filipo a Arcadión su censurador, buscando que aquel mudase como este con la paga la detracción en elogio (Plutarco, de non trascendo). Tampoco haría caso de papeles y cartas familiares y combirtiendo mi dicimulo en ignorancia los condenaría al fuego con el exemplo de César que por no saber de sus ofensas mandó quemar las cartas que se encontraron en los Escritorios de Pompeyo (Séneca, de ira, Lib.2, cap.23)...Boy pues presisado de los respetos de la Justicia y de mi empleo a haser lo que el Aguila que aunque desprecia los gritos importunos de las Cornejas, destroza a la serpiente que la ciñe: y entonces cúlpese assimismo el Albacea, que no ha tenido tanto instinto como aquellas Aves de Septremtión que para pasar el Monte Cáucaso toma cada una su piedra en el pico poniendo mordaza a sus grasnidos por no despertar las Aguilas que anidan en su cumbre (Ammiano Marcelino, Lib.18)". Cuando más adelante Cañete se refiere a la forma con que el R.P. Dr. Mariano de Mina y Escobar pinta los hechos, "...me ocurrió a la memoria la que cuenta Eliano de aquel Cavallo que pintó Pauson insigne y gracioso Pintor del tiempo de Sócrates dibujando su figura patas arriba: y juzgo mui adecuada la respuesta que se le dió al joben descontento para quien se había formado el dibujo que fué prebenirle que bolbiera la tabla. Con cuiá única diligencia hallo que todo el defecto consistía en el modo de mirar la pintura: pues con solo haberla mirado por diberso lado apareció un cavallo generoso, y veloz, en lugar

---

del que se había visto caído trastornado y sin acción, en aquella misma estampa (Variarum Historia, Lib.14, cap.15)". (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.10,10v., y 12v.). Sobre Cañete, ver Just Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361.

<sup>4623</sup> "...Si dos individuos debiesen el uno veinte mil pesos y el otro cuatro mil, y cada uno trabajase en un ingenio de dos cabezas, con el producto semanal de cien marcos, se descontarían igualmente al uno que al otro seis pesos dos reales por semana, que componen \$325 al año (si la contribución fuese sólo de medio real [por marco]) y en llegando [el descuento] a un real por marco sería el desfaldo [o descuento] semanal hasta doce pesos cuatro reales y en el año \$650. En el primer caso descuento de medio real] el deudor de los cuatro mil pesos tendría pagada toda su deuda a los doce años y ocho meses, y en el segundo [del descuento de un real por marco] acaso a los seis años poco mas, cuando el otro que debe los veinte mil apenas hubiera desquitado una quinta parte de ellos. Y pues el Proyecto supone que en 25 años quedarán canceladas los \$403.900 que se deben al Banco, se sigue que al cumplimiento de este plazo [de 25 años] el uno [el que menos debía] vendría a pagar cuatro mil pesos mas que no debía, y el otro [el que más debía] envolsaría en su propio beneficio doce mil pesos que quedaron por pagar, y no tendría ya que satisfacer, habiendo de estar para entonces abolida toda la deuda actual del Banco" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.123, Exp.3094).

<sup>4624</sup> Idem, fs. 89v.

<sup>4625</sup> Idem, fs. 111.

<sup>4626</sup> Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). En 1797 fué cruzado Caballero de Carlos III (Buechler, 1989, 359). Aparentemente tuvo una hija ilegítima llamada Luisa de Orueta, concebida en Francisca Villanueva durante una estadía que tuvo en Buenos Aires (Buechler, 1989, 355).

<sup>4627</sup> cuñado de José de Oña y Bravo.

<sup>4628</sup> Tuvo tres matrimonios, el primero con Petrona Scholl y Peñarubia, nieta del azoguero Juan de Peñarubia; el segundo con Rosalina Segovia, hija de Juan José Segovia y de Manuela del Risco y Agorreta; y el tercero con Clara Zamudio, hija de Pedro Zamudio (Buechler, 1989, 349, nota 279; 367, nota 378; y 396). Fué arrendatario del Ingenio de Alantaña.

<sup>4629</sup> En el litigio sobre la Testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete confesaba vivir "...lleno de paz y de contento: por que sé que todo hombre de bien, dirá de mí lo que escribió Plutarco de Phoción de quien decía: para que había de anelar ser quarenta y cinco veces Governador y General de Atenas, si los Embajadores de Alexandro lo habían de encontrar en la estrecha abitación de una Casa que no tenía otro adorno que el de su virtud? Ni para que había de solicitar Epaminondas el Gobierno de Tebas, si después de su muerte no le habían de hallar mas alajas que una pequeña brocha de fierro? Así pues tengo la complasencia lisongera de que el mismo Dn Mariano Mina repitirá con dolor suio muchas veces el recuerdo de estos dignos exemplares, por que ha estado en Potosí y en mi casa, y abrá dicho dentro de su corazón lo mismo que Plutarco dejó ponderado de Phoción y de Epaminondas" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29).

---

<sup>4630</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.123, Exp.3094

<sup>4631</sup> Idem.

<sup>4632</sup> Idem.

<sup>4633</sup> sobrino de Antonio Zabaleta, y marido de Felipa de Otondo, hija del Marqués de Otavi Joaquín José de Otondo y de Josefa Ezcurrechea (Buechler, 1989, 326 y 387).

<sup>4634</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.121.

<sup>4635</sup> Idem, fs.122.

<sup>4636</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.102v.

<sup>4637</sup> de ejercicio Baxador de metales.

<sup>4638</sup> Caso con una hija del azoguero Francisco Mayora (Buechler, 1989, 360). En 1787 pide permiso para pasar a Salta (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.351). En 1791 Juan Gil lo demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg. G-18, Exp.2). En 1792 Joaquín Pérez le vende su parte en la Hacienda-Ingenio de Guariguay (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691). En 1795 adquiere sus partes en un Ingenio de moler metales de Potosí a sus cuñados Gaspar, José y Manuel Mayora (AGN, Interior, Leg.37, Exp.5).

<sup>4639</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103.

<sup>4640</sup> Hijo del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710 (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120).

<sup>4641</sup> cuñado de Juan Antonio Fernández Dorado.

<sup>4642</sup> Arrendatario en 1781 del Ingenio de moler metales de Potosí denominado "Los Barraganes", y en 1786 arrienda el Ingenio de la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, perteneciente a Ignacia Fernández Pacheco y Escalante, mujer de Manuel Bernabé y Madero, heredera de Estéban Escalante. Poseía las Labores de Guebara y Carmen Chico.

<sup>4643</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103v.

<sup>4644</sup> Hablaba quechua y aymara (Buechler, 1989, 337).

<sup>4645</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.123.

<sup>4646</sup> Idem, fs.154v.

<sup>4647</sup> Idem, fs.126.

<sup>4648</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

<sup>4649</sup> En Bengala se prestaba en ese tiempo a los colonos al 40% y 60%, y en la China el

---

interés corriente del dinero alcanzaba al 14%. De igual manera, en las colonias de América del Norte y de las Indias Occidentales, Adam Smith confiesa que no sólo los salarios del trabajo sino el interés del dinero son más altos que en Inglaterra (Smith, 1979, 90-93).

<sup>4650</sup> ver Sánchez González, 1991, 286.

<sup>4651</sup> "...Estos son unos Parages de Tierras feracísimas en primorosos vegetales especialmente en el renglón de la Coca, y opulentos minerales tanto de vetas como de aventaderos, pero despoblados, abandonados, y por decirlo en una palabra, sin otro aspecto del que tubieron aora doscientos años, y tal vez menos, porque se sabe por la Historia, y tradiciones de estas Provincias, que los Realistas Comandados por el Capitán Diego Zenteno, quando fueron vencidos por el Rebelde Francisco Carbaxal, que fomentaba y sostenía el levantamiento de los Pizarros en aquella sangrienta Batalla de Guarina [Huarina] en que fueron derrotados, y en cuia memoria se erigió allí el Templo al Señor de las Batallas, que en nuestros días tanto se venera, tomaron los Realistas derrotados el asilo en las asperas Montañas y Cordilleras que desde aquellas llanuras se levantan y trastornadas hicieron la primera y más antigua Población de Challana [en el actual Departamento de La Paz, Provincia de Larecaja] de que se conserban todavía grandes vestigios" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.39, fs.20v.).

<sup>4652</sup> Santamaría, 1987, 436.

<sup>4653</sup> Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

<sup>4654</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

<sup>4655</sup> Idem.

<sup>4656</sup> Idem.

<sup>4657</sup> Ibídem.

<sup>4658</sup> Ibídem.

<sup>4659</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

<sup>4660</sup> Idem, fs. 22v.

<sup>4661</sup> Idem, fs. 23

<sup>4662</sup> ver Allen, 1981. Con la Sublevación el precio de la coca llegó a las nubes, de 16 a 18 pesos el cesto, justo el doble que en tiempos normales, al extremo que "...algunos Indios suelen en lugar de la coca tomar la Auchicoca, que es una simiente con que se alimenta una Ave de este nombre, que pasándose a las Montañas la depone, y de que nace otra semilla que llaman Chunchicoca, que en su idioma significa coca tierna. La Koa o Poleo es otra especie que en la reciente sublevación han usado los Indios de la Puna a falta de su yerba principal, masticándola y acullicando con ella como es constante" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.299). En cuanto a los Indios del Oriente Alto peruano, "...mascan también la hoja de un Arbol que llaman Betel, y lo que es digno de reflexión mezclándola como estos con cierta masa de polvos de cal, pero ellos no creen que les inspira vigor, y solamente la usan porque reconocen que les da buen aliento y preserva su

---

dentadura. Si el Betel fortifica el estómago, como lo asegura el autor del Diccionario de la hystoria natural Mr. Valmont de Bomare, será porque lo usan siempre acompañado de los granos de cardamomo, u fruta del Paraíso, del Cachou que es una especie de goma de la Palma llamada Arec, del Caté o licium indicum, y del clavo, frutos nobles y aromáticos: estos pobres indios no acompañan su coca, sino de su llipta, que viene a ser nada mas que un compuesto de algunas sales, o cal incorporadas en cierta masa de algún vegetal: así su calidad no debe ser nutritiva y eficaz, ni probables los cuentos de sus virtudes" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg. 13, Exp. 300).

<sup>4663</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 23.

<sup>4664</sup> Idem.

<sup>4665</sup> Por lo visto ignoraban el caso español, ver Alvarez Vázquez, 1978, 405-435.

<sup>4666</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 24v.

<sup>4667</sup> Idem, fs. 25

<sup>4668</sup> Idem, fs. 25

<sup>4669</sup> Idem.

<sup>4670</sup> Alvarez Vázquez, 1983, 568.

<sup>4671</sup> Roll, 1942, 71; Heckscher, 1943, 615,645; Schumpeter, 1984, 306; y Sánchez González, 1991, 286.

<sup>4672</sup> Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 89.).

<sup>4673</sup> Idem, fs. 89v.

<sup>4674</sup> Idem, fs. 90.

<sup>4675</sup> Idem, fs. 90v.

<sup>4676</sup> Idem,

<sup>4677</sup> Burga, 1979, 82.

<sup>4678</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 90v.

<sup>4679</sup> Idem, fs. 91.

<sup>4680</sup> Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

<sup>4681</sup> Assadourian, 1983, 285.

<sup>4682</sup> Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

<sup>4683</sup> Assadourian, 1983, 289.

---

<sup>4684</sup> Spooner, 1972, 74.

<sup>4685</sup> Para conocer el impacto del colapso imperial en economías como la de Tucumán, ver Parolo, 2005.

<sup>4686</sup> AGN, Sala IX, Leg. 98, Exp. 2558.

<sup>4687</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 100, Exp. 2612; Leg. 97, Exp. 2539, fs. 1-5.

<sup>4688</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 7, Exp. 1, fs. 67v.

<sup>4689</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. V-4, Exp. 2, fs. 106.

<sup>4690</sup> "...a la verdad que cuando no se califique por excesivo el precio de cinco reales y medio por cada vara de ropa en que estimó Juan Francisco Alvarez Campana la que mutuó a Garamendi, no se puede negar que éste fué el precio supremo de aquella especie, que por lo regular se ha estimado aún por menos de cuatro reales y que sin duda se consideró legítimo por que en el concepto de los comerciantes se juzga comunmente que las cosas vendidas al fiado valen mas que vendidas al dinero de contado" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-10, Exp. 5, fs. 26v.)

<sup>4691</sup> Entre los factores determinantes de la velocidad de rotación del circulante se suele mencionar: a) el estado de desarrollo del sistema financiero y crediticio y su grado de utilización; b) el grado de separación entre el atesoramiento y el ahorro, entre el ahorro y la inversión, y entre la inversión y el consumo; c) el sistema de pagos vigente, y d) las expectativas respecto a futuros ingresos y precios.

<sup>4692</sup> "...La oposición se funda en las Leyes 7, título 24, libro 4, y en la Ley 7, título 17, libro 6 de las Recopiladas de Indias que gradúan al peso en frutos por seis reales plata: en la Real Cédula dada en Villaviciosa a 24-XII-1758: en la Real Provisión de Su Alteza dada en la Plata en 14-X-1755: en la sentencia pronunciada por este Gobierno en 14-XI-1782: en el pleito seguido por el Procurador Síndico desta ciudad, y los Escribanos della, y últimamente en la Real Provisión expedida por la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires a instancia de Don Pedro Hurtado de Mendoza en 18-II-1794" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7).

<sup>4693</sup> Burzio, 1958, 122.

<sup>4694</sup> Cada peso hueco se componía también de una fanega de maíz, o de cuatro almudes de frijoles o porotos, o de una vara de lienzo, o de tres libras de garabata (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7).

<sup>4695</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

<sup>4696</sup> Garavaglia, 1983, 393.

<sup>4697</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

<sup>4698</sup> Idem.

<sup>4699</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7, fs. 33v.

<sup>4700</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3.

<sup>4701</sup> Idem.

<sup>4702</sup> ver las Relaciones entre precios de tres productos básicos: yerba mate de palos, res vacuna y lienzo en Tablas X-1A y X-1B (Carbonell, 1992, 230-232).

<sup>4703</sup> El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

---

<sup>4704</sup> José Luis de Acosta, quien entre 1786 y 1789 opera con ganado, contrae en 1793 y 1795 un par de operaciones por valor de \$2.471; Domingo Arizaga, quien en 1786 vende animales en pié, en 1792 contrae en Buenos Aires una obligación mercantil por valor de \$1.486. Angel Escobar, quien entre 1785 y 1793 opera con hacienda en 1800 contrae una obligación con comerciantes porteños por valor de \$2.019. Miguel Gerónimo Gramajo, quien entre 1788 y 1791 trafica con ganados, en 1795 contrae una obligación mercantil por valor de \$7.738. José Pablo Insaurralde, quien sufriera el embargo de sus tierras durante la Revolución de los Comuneros (1766), contrae una obligación en 1768 por valor de \$6.837. Felipe Ignacio Iturrino, quien entre 1785 y 1791 opera con hacienda, en 1787 contrae una obligación por valor de \$3.216. Ignacio Rolón, quien en 1782 opera con ganados, en 1791 contrae una obligación por valor de \$1.405.

<sup>4705</sup> Era hijo de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández, hermano de Bernardo y Gregorio de Casajús, y casado dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

<sup>4706</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4, 1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

<sup>4707</sup> Hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de María del Carmen Acosta (Fernández de Burzaco, III, 153).

<sup>4708</sup> Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, con cuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y Argañaráz.

<sup>4709</sup> "No ha llegado a mi noticia que algún mercader hubiese traydo a esta ciudad no digo mil pesos, ni quinientos, ni ciento a venderlos por efectos de la tierra, ni habrá quien diga lo contrario, que la plata que corre, no es otra, que la que ganan los dependientes del estanco y la poca que los peones de los Barcos del Paraguay traen de regreso de Río arriba, y la venden a las mujeres pobres, por faxas, sinchones, ataderas, y maletas, y que caudal es este, que apenas los que le alcanzan tendrán que llevar al Estanco tabaco, quedandose la mayor parte de la gente con la misma necesidad sufriendo la falta del vicio, el que en la gente ordinaria es puro vicio, pues teniéndolo en la boca se pasan el día sin que les haga falta la comida, como sucede lo mismo a los Indios Peruanos con la Coca" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 422).

<sup>4710</sup> Garavaglia, 1983, 393.

<sup>4711</sup> Idem.

<sup>4712</sup> Idem, fs. 35v.

<sup>4713</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3, fs. 17.

<sup>4714</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-4, Exp. 5, fs. 8.

<sup>4715</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6.

<sup>4716</sup> Idem, fs. 4.

<sup>4717</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

<sup>4718</sup> Maeder, 1981, 223.

<sup>4719</sup> Maeder, 1981, 222.

<sup>4720</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 130, Exp. 3263, fs. 5v.

<sup>4721</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1428, fs. 83v.

<sup>4722</sup> Idem, fs. 87v. En otras oportunidades "...lo que podía conseguir por \$2 al cambio de yerba y algodón, no se lo daban a \$4 por tabaco" (Arias Divito, 1976, 4)

---

<sup>4723</sup> Mientras la arroba de tabaco de hoja valía a razón de 14 reales cada una, cada arroba de tabaco de pito valía 10 reales (Arias Divito, 1978, 180).

<sup>4724</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791.

<sup>4725</sup> Idem. En cuanto la planta de tabaco se halla bastante crecida, y antes de que sus hojas tengan 2 cm. de longitud, es preciso descogollarla o desbotonarla, para dar mayor alimento posible a las hojas, haciendo que a ellas refluya la savia que se dirigía a las flores. De esta manera, las hojas que se dejan, que generalmente varían de 8 a 16, han de pesar más que las 20 o 24 menos desarrolladas que produciría la planta si no se hubiese descogollado. Esta operación debe repetirse cada ocho o quince días, esto es, de dos a cinco veces hasta el momento de la recolección, y esta operación exige de 4 a 8 jornales por hectárea (Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano).

<sup>4726</sup> De acuerdo con la información obtenida de los Resúmenes Generales de los caudales de los Ramos de la Real Hacienda, el Ramo de la Divisoria de Límites recaudó durante los 18 años que transcurrieron entre 1749 y 1767 la suma de \$3.641.261; y gastó entre 1794 y 1802 la suma de \$287.449.

<sup>4727</sup> AGN, División Colonia, Expedientes-Hacienda, 1758-1806, Sala IX, 10-1-2, fs. 6v.; Cooney, 1979, 105-126; y Garavaglia, 1987, 246.

<sup>4728</sup> Idem.

<sup>4729</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

<sup>4730</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 63, Exp. 9, fs. 24.

<sup>4731</sup> Idem.

<sup>4732</sup> AGN, División Colonia, Expedientes, 1784-1810, Sala IX, 9-3-6, fs. 208v.

<sup>4733</sup> Idem.

<sup>4734</sup> Idem, fs. 209.

<sup>4735</sup> Idem, fs. 208.

<sup>4736</sup> La inutilidad del tabaco negro del Paraguay obedecía a la escasez de goma reinante en ese suelo. El tabaco de pita de Villa Rica "es comunmente de mala calidad por falta de goma, y por lo mismo se inutiliza y no se conserva; pues la misma humedad, que se necesita para el enmanejo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase produce aquel temperamento de calidad conservable. Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, "que se compone de las primeras que produce la planta en su mayor vigor, y se atraen comunmente toda la escasa goma que produce aquel territorio, es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791).

<sup>4737</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.

<sup>4738</sup> Idem.

<sup>4739</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>4740</sup> Saguier, 1991.

<sup>4741</sup> Diego de los Reyes Balmaceda, Rafael de la Moneda, Martín José de Echauri, Marcos José de Larrazábal, José Martínez Fontes, Agustín Fernando de Pinedo, y Lázaro de Ribera.

<sup>4742</sup> Las instalaciones de las cuarenta estancias yerbateras de la región de la Villa Real de Concepción fueron incendiadas en la década del 90 por los indios Mbayás.

---

<sup>4743</sup> Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme al Paraguay, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de Asunción.

<sup>4744</sup> nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaquirre; con cuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; Fernández de Burzaco, IV, 359; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 7165).

<sup>4745</sup> Lynch, 1967, 112, nota 88.

<sup>4746</sup> Garavaglia, 1987, 229 y 238.

<sup>4747</sup> Las economías agrarias del mundo colonial respondieron en forma desigual a los reclamos de desarrollo económico. En el caso de Antioquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de McGreevey (1975) y López Toro (1970), opinaron que la agricultura y la minería proveyeron en el siglo XVIII a algunos antioqueños suficiente capital líquido como para sostener un patrón de inversiones diversificadas y un comportamiento empresario transformador (Twinam, 1977, 1-3). En igual sentido opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la alegada pobreza y atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto de las posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42).

<sup>4748</sup> Saeger, 1972, 229.

<sup>4749</sup> Natural de Burgos, Asturias. Luego Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Propuso al Rey en un Informe abolir las encomiendas, organizar tropa reglada, y fomentar la complementación económica con el Alto Perú (Arréllaga, 1976, 55). Era marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce; padre del Coronel Agustín José de Pinedo, quien fuera marido de Juana Albizuri y Echauri; y suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y del Corregidor, Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar (Fernández de Burzaco, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5929). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

<sup>4750</sup> Velázquez, 1981, 216.

<sup>4751</sup> El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para mascararlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa.

<sup>4752</sup> Cooney, 1992, 103; y Jerry W. Cooney "The Great Swindle: How to Destroy the Paraguayan Tobacco Monopoly, 1787-1792" (manuscrito inédito, 1991), p.4. Le agradezco al Dr. Pastore me haya facilitado copia de este valioso trabajo.

<sup>4753</sup> Romero de Viola, 1987, 115.

<sup>4754</sup> El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

<sup>4755</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs. 518; Reg.4, 1753, fs. 413 y 413v.; Reg.1, 1753, fs.594v.; Reg.2, 1759, fs.67v. y 62; y Reg.4, 1759, fs. 447.

<sup>4756</sup> Alcalde en 1747, hijo de José de León y Zárate, y de su sobrina-nieta Agueda de Valdivia y Brizuela, y nieto del Gobernador y Encomendero Sebastián de León y Zárate. Estaba casado con Ana del Casal (hermana de José del Casal y Sanabria, el marido de Rosa Fernández de Valenzuela), con quién fueron padres de

---

Jacoba, mujer de Fortunato Ruiz de Arellano, y de José Ignacio, marido de María de Zavala y Delgadillo. Sebastián era hermano de Diego, casado con María de Roxas y Aranda, hija del Cap. Isidro de Roxas y Aranda y de María Servín; del Dr. Ignacio; de Catalina, mujer del Sargento Mayor José de Almada, miembro de la facción "contrabandista"; de Ana o Mariana, mujer de Joaquín de Roxas y Aranda; de María Francisca, mujer del Maestre de Campo Martín de Chavarri y Vallexo, miembro de la facción "contrabandista"; y de María, casada con Antonio Caballero Bazán, hijo de Francisco Caballero Bazán y de María de Encinas y Mendoza, integrante también de la facción "contrabandista" (Quevedo, 1984, 97). Sebastián era sobrino de María Mayor de León y Zárate, que fuera mujer del General Alonso Fernández Montiel, santafesino, y este último a su vez primo del Maestre de Campo General Sebastián Fernández Montiel, principal lugarteniente del Maestre de Campo Juan Gregorio Bazán de Pedraza en todos los trabajos de la repoblación del Guarnipitán (Velázquez, 1964, 19).

<sup>4757</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1755, fs.104v.; Reg. 6, 1755, fs.113v.; Reg. 1, 1755, fs.133v.; Reg.2, 1755, fs.198v. y 209v.; y Reg. 4, 1755, fs.52v. y 94.

<sup>4758</sup> Caballero de Santiago, hijo de Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; contrajo primeras nupcias con Mariana Arrascaeta, hija del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar y de María Ferreira de Acevedo, y hermana del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta y del Alcalde de primero y segundo voto Gregorio Arrascaeta; y segundas nupcias con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos; cuñado del ex-Gobernador del Paraguay Coronel de Ejército Martín José de Echauri, de Juan de Otárola, del comerciante registrero José Antonio de Iturriaga, del Gobernador de Tucumán Gregorio de Matorras, de Martín de Arraiz y de Pablo de Aoiz; y conuñado de Francisco de Espinosa Moxica de los Monteros, de Ignacio Irigoyen, del Teniente Coronel Juan Antonio Marín, y de Domingo de Lajarrota (Fernández de Burzaco, IV, 114; y V, 253; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 1415; y 1989, ítem 4210).

<sup>4759</sup> Marcos José de Larrazábal al Virrey del Perú, Asunción, 20-IX-1747 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7).

<sup>4760</sup> Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo; hijo bastardo del Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, legitimado por el Rey, y casado con Juana Catalina Domínguez, hija de Juan José Domínguez de Ovelar y de Jacinta de Roxas y Aranda, nieta del Cap. Juan Antonio Domínguez y de su prima hermana Antonia de Yegros (Quevedo, 1984, 77). José Cañete era padre del célebre autor de la Guía de Potosí, Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez. José Cañete era entonces sobrino político del último jefe de los Comuneros del Paraguay, el General Cristóbal Domínguez de Ovelar (Velázquez, 1964, 21).

<sup>4761</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1766, fs.131; Reg.6, 1766, fs.200 y 200v.; Reg.2, 1766, fs.211; Reg.3, 1766, fs.118v.,123,124v., y 127v.

<sup>4762</sup> Andaluz, marido de Teresa Iriarte Orzusa; y padre de Catalina Tadea de Larios Galván, mujer del portugués Antonio Martínez Viana (Alvarenga Caballero, 1978, 217).

<sup>4763</sup> AGN, Protocolos, Reg. 4, 1761, fs. 401; Reg.3, 1775, fs.31 y 25.

<sup>4764</sup> Portugués, especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco torcido negro y del Pueblo de Indios de Yaguarón, casado con María Josefa Fabiana Velasco y Yegros. Padres del que fuera el Dictador del Paraguay José Gaspar Rodríguez de Francia. María Josefa era sobrina de Fulgencio de Yegros y Ledesma, y en consecuencia prima de José Antonio Yegros (casado con María Angela Franco de Torres, a su vez padre de Fulgencio Yegros, prócer de la Independencia Paraguaya, nacido en Kykyó en 1780, y fusilado en julio de 1821). Asimismo era sobrina de Francisca de Yegros y Ledesma, mujer del Sargento Mayor Domingo de Flecha (Velásquez, 1981, 237).

<sup>4765</sup> El tabaco torcido negro lo fabricaban exclusivamente los pueblos de indios por requerir mucha mano de obra. En su gestión al frente de este Pueblo, Francia se destacó por su crueldad (AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.1).

<sup>4766</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1760, fs.214 y 222; Reg. 4, 1760, fs.186v.; Reg. 6, 1760, fs. 508v.; Reg. 3, 1762, fs.157v. y 164; Reg. 2, 1762, fs. 72; Reg. 6, 1765, fs. 176v.; Reg.6, 1769, fs.242v. y 264; y Reg.5, 1781, fs.110.

---

<sup>4767</sup> AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2.

<sup>4768</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.105, Exp.9.

<sup>4769</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>4770</sup> probablemente se trate de José Antonio Yegros, ya que éste es mencionado como Subdelegado por ese partido por Juan Francisco Aguirre, en su famoso Diario.

<sup>4771</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>4772</sup> hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207).

<sup>4773</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>4774</sup> a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay los Patrones le asignaban como concesión tres mazos de tabaco (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4).

<sup>4775</sup> Arias Divito, 1976, 10

<sup>4776</sup> El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para mascararlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa.

<sup>4777</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.

<sup>4778</sup> Maeder, 1981, 352-361.

<sup>4779</sup> Arias Divito, 1984, 63-107; y Socolow, 1987, 295-299.

<sup>4780</sup> Cabildos seculares como el de Tucumán se hallaban mediatizados por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes, y por la dominación política ejercida por el Gobernador-Intendente de Salta. En 1772, en oportunidad en que infructuosamente se intentó imponer la Renta de Tabaco en Tucumán y cuando los miembros de la extensa familia de los Aráoz ocupaban los cargos más destacados del Cabildo, se suscitó uno de los acontecimientos populares más trascendentes de la historia del Tucumán colonial: el unánime rechazo de la imposición de la Renta del Tabaco (Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988b, 27). Francisco de Paula Sanz señala en su correspondencia de 1779 que algunos hombres procedentes de Tarija habían procedido en Tucumán, desde hacía seis años, al cultivo del tabaco, por haberse restringido las siembras en Tarija (Arias Divito, 1978, 32). Pero el caso era que en la provincia de Salta del Tucumán la Renta del Tabaco también perseguía los cultivos clandestinos. José Tomás Sánchez, Administrador General del Real Estanco de Salta, informaba a la Dirección General de Tabaco y Naipes establecida en Buenos Aires que José Mariano Soloaga, Administrador Principal en Tucumán solicitaba se le abonaran \$2253

"...impendidos en la laboriosa operación que verificó para destrozarse, y aniquilar las siembras clandestinas de tabaco, que con detrimento de los intereses del soberano se practicaban en los bosques, y serros de aquella jurisdicción" (AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.),

Fué por ello, que en ocasión de arribar a Tucumán en 1772, el Administrador de la nueva Renta de Tabacos Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, se desató una airada como sarcástica protesta popular, matizada por pasquines en verso e imágenes de bulto, que se relatan en otro trabajo de este autor (José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991). En el caso concreto de la Administración de Tabacos dirigida por el Coronel Manuel Estéban de Castro, ésta gozaba de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la

---

intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porqué los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15). Alcaldías de Hermandad como las de Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. Doña Catalina Zambrano, mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estancquillero Agustín Iglesia, quien la había denunciado por la fuga de su esclavo, a quien le había prestado un caballo, por cuanto "...se cree autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas" (Archivo General de la Nación, Sala IX, Tribunales, Leg.S-11, Exp.28, fs.2). Iglesia se había tomado "...un asendiente sobre todos aquellos pobres hombres, que habitan el partido de Areco de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades, y echo temible a los Alcaldes Pedáneos, y al vecindario" (Ibídem). Aparentemente también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones impuestas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. El Administrador de la Renta de Tabacos de La Rioja y Capitán de Milicias José Antonio Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilado a sus propios soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas. Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera del Río del Valle (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.).

<sup>4781</sup> Arias Divito, 1978, 7. En las tercenas, a cargo de la venta al por mayor, se gratificaba al 7%; y en los estancquillos, a cargo de la venta al por menor, se gratificaba al 5% (Arias Divito, 1987, 13). Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas de Catamarca no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires (Guzmán, 1985, 268).

<sup>4782</sup> Garner, 1978, 546.

<sup>4783</sup> Amén de la Renta del Tabaco, se llegó a aconsejar la importación de tropa reglada para generalizar el uso de la moneda metálica. En Asunción del Paraguay, el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo fué quien en un Informe elevado al Rey en 1777 aconsejaba organizar "tropa reglada", por cuanto ello implicaría amén de otros beneficios (que no menciona) "...lograr imponer el uso de la moneda" (Arréllaga, 1976, 55).

<sup>4784</sup> Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

<sup>4785</sup> En 1801 fué Comandante de Armas en ausencia del Gobernador Lázaro de Ribera (Frakes, 1989, 503).

<sup>4786</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.7.

<sup>4787</sup> Ibídem.

<sup>4788</sup> Idem, fs.21.

<sup>4789</sup> Lynch, 1967, 108.

<sup>4790</sup> Cardozo, 1959, 104; y Rivarola Paoli, 1988, 55.

<sup>4791</sup> Cardozo, 1959, 104.

<sup>4792</sup> En 1788 el Cabildo de Asunción proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían financiados estancando el ramo de la yerba (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88).

<sup>4793</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88; y Susnik, 1990, 93. A este proyecto se opuso con éxito en ese entonces el cabildante José del Casal y Sanabria, gran amigo del Gobernador Pedro Melo de Portugal y Villena (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88). En 1797 dicho

---

proyecto lo propuso el nuevo Gobernador Lázaro de Rivera, por intermedio del Regidor Decano Don Fermín de Arredondo Lovatón, y la mayoría de los cabildantes (Alférez Real Bernardo de Argaña, Alguacil Mayor José Estéban de Arza, el Procurador Síndico Juan Francisco Decoud, y Regidores José Doria, José Teodoro Fernández, Sebastián Antonio Martínez Sáenz, Juan Ignacio Villasanti, Luis Bargas Machuca, y Narciso de Echagüe y Andía), oponiéndose también el Alcalde de Primer Voto José del Casal y Sanabria, quien presidía el Cabildo, arguyendo en contrario la existencia de "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y cuando por otra parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas de no repetir premio" (Ibídem, fs.88v). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este último proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron atribuidos a la oposición de Casal, le costó a este último, según su abogado el Dr. Mariano Zavaleta, ser injustamente implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel José de Espínola y Peña, en la cruel muerte de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. En realidad, según un testimonio, dichos indios "...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y Tacuarí y cuñado de Casal] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos extremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas" (AGN, Interior, Leg.40, Exp.3, fs.101; y Susnik, 1990, 68). Del Casal fué detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, y en mayo de 1799 con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictámen del Lic. Tomás Antonio Valle fué absuelto de culpa y cargo (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15). Casal y Sanabria, fué objeto también de la venganza del Gobernador Rivera contra el Virrey Marqués de Avilés. Por ser Casal el anfitrión y amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal, empresa en la cual Avilés había invertido gran parte de su gestión, habría sido tomado por Rivera como chivo expiatorio.

<sup>4794</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.4.

<sup>4795</sup> Ibídem.

<sup>4796</sup> Ibídem.

<sup>4797</sup> Ibídem.

<sup>4798</sup> Ibídem.

<sup>4799</sup> Ibídem.

<sup>4800</sup> Ibídem.

<sup>4801</sup> Ibídem.

<sup>4802</sup> Ibídem.

<sup>4803</sup> Idem, fs.15v.

<sup>4804</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6.

<sup>4805</sup> comprueba un aumento de la población para fines de siglo (Maeder, 1975, 67).

<sup>4806</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6v.

<sup>4807</sup> Ibídem.

<sup>4808</sup> Considerando que la Francia antes de la Revolución ascendía según el Mariscal de Vaubam a 916 individuos por legua cuadrada (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24).

---

<sup>4809</sup> 80 leguas de norta a sur por 40 de este a oeste.

<sup>4810</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.23v.

<sup>4811</sup> Idem, fs.23v.

<sup>4812</sup> Artículo 32, Capítulo 2 del nuevo Reglamento de Milicias.

<sup>4813</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24.

<sup>4814</sup> Idem.

<sup>4815</sup> Idem, fs.25.

<sup>4816</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8.

<sup>4817</sup> Idem.

<sup>4818</sup> El Regimiento de Costa Grande tenía que cubrir los Presidios de San Gerónimo, Lambaré, San Antonio, Villeta, Angostura, Macaypirá, Ybioca, Yundyay, Lovato, Remolinos, Herradura, Taguaras, Boquerón, Neembucú, Fortín y Reducción de San Francisco Solano. En los cinco primeros destinos y en el de las Taguaras, Neembucú y Boquerón debían entrar 20 hombres por el término de ocho días. En los Presidios de Macaypirá, Ybioca, Yundyay y Lovato debían entrar otros 20 hombres por el término de quince días (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8).

<sup>4819</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8v.

<sup>4820</sup> Idem.

<sup>4821</sup> Idem.

<sup>4822</sup> Idem, fs.9.

<sup>4823</sup> Idem, fs.10.

<sup>4824</sup> Idem, fs.10v.

<sup>4825</sup> Idem, fs.27.

<sup>4826</sup> Idem, fs.10.

<sup>4827</sup> Idem, fs.11v.

<sup>4828</sup> Idem, fs.9v.

<sup>4829</sup> Idem.

<sup>4830</sup> Idem.

<sup>4831</sup> Idem.

<sup>4832</sup> de los tres mazos de tabaco que a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay se les asignaba, ...también es cierto que cuando al tiempo de la marcha se les reparte la ración por un Dependiente del resguardo por lo común dejan a sus mujeres y familias la mayor parte de este tabaco (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4 y 6v.).

<sup>4833</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.11.

---

<sup>4834</sup> Idem, fs.11.

<sup>4835</sup> Idem, fs.14v.

<sup>4836</sup> Idem, fs.15.

<sup>4837</sup> Idem.

<sup>4838</sup> Idem, fs.21v.

<sup>4839</sup> Idem.

<sup>4840</sup> Idem, fs.22.

<sup>4841</sup> Idem, fs.14.

<sup>4842</sup> A la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" se opuso terminantemente el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89).

<sup>4843</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2.

<sup>4844</sup> Idem, fs.14v.

<sup>4845</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>4846</sup> Saguier, 1991.

<sup>4847</sup> Brito Stéfano, 1953.

<sup>4848</sup> Gelman, 1987, 1989; y Salvatore y Brown, 1987, 1989.

<sup>4849</sup> Assadourian, 1983, 285.

<sup>4850</sup> Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

<sup>4851</sup> Assadourian, 1983, 289.

<sup>4852</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp.1769, fs. 1.

<sup>4853</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14.

<sup>4854</sup> Sala de Touron, 1967, 40.

<sup>4855</sup> acerca del cardo, ver Amaral, 1990.

<sup>4856</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1769, fs.1.

<sup>4857</sup> AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.14.

<sup>4858</sup> ver Buchbinder, 2004, 32. Sobre el Artiguismo, ver Barbagelata, 1914; y Jesualdo, 1940. Sobre la despoblación de las rinconadas entrerrianas, en especial el denominado Potrero de San Lorenzo (luego Potrero de Unzué), ver la correspondencia que mantenía con sus capataces y mayordomos en Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay), de Isabel Álzaga, viuda de Ángel Mariano de Elia y García de Zúñiga, en Elia, 1961.

<sup>4859</sup> Las diferentes series de precios habrán de ser promediadas mediante el método de los números-índice o

mediante tasas. Hamilton (1947) y Levene (1962) calcularon sus números índice a través de la simple media aritmética. En su lugar, Broide (1951) utilizó el promedio geométrico por ser menos sensible a los desvíos extremos. Por el contrario, Nadal (1959) empleó medias móviles, donde las variaciones las refiere no a un punto fijo inicial, sino a los períodos precedentes en cada caso. Los números índices o relativos simples dan la evolución en el tiempo del cociente de los valores de cada serie dividido por el valor correspondiente a un período que se toma como base. Como base de los índices habremos de tomar los valores que no ofrezcan alteraciones bruscas con respecto al promedio de la serie. Los criterios metodológicos a instrumentar en la selección del período base varían según el interés perseguido por el investigador. Para Levene (1962) los precios base son los precios correspondientes a los períodos de paz que sirven de punto de comparación con los precios de los años de guerra. Las guías marítimas, las escrituras de factoraje, y las facturas incorporadas en los litigios judiciales nos brindan una información invalorable. De aquí que a los efectos de poder seleccionar el período base más útil para el estudio de las crisis cíclicas sea preciso volver al método instrumentado por Levene (1962), manteniendo el año calendario como la unidad de análisis cronológico más operacionalizable. Para calcular el movimiento estacional mediremos los desvíos estacionales y los desvíos mensuales medios. Los primeros tratan de los desvíos entre la media mensual más baja y la media mensual mas alta, y los segundos consisten en las desviaciones de las medias mensuales respecto de las medias anuales. Respecto a la ponderación, los criterios para seleccionar el método más conveniente para estimar series incompletas, varían de acuerdo a los intereses metodológicos de cada investigación en particular.

En virtud de la naturaleza incompleta de la estadística del comercio exterior porteño, Broide (1951) eligió una ponderación conjetural de tipo directo, que consiste en suponer, fundándose en los calculos de Burgin (1946), que los cueros formaban aproximadamente la mitad de los envíos al exterior, dividiéndose la otra mitad entre astas, cerdas, lanas, sebo y tasajo. Respecto a la composición de los cueros, Broide (1951) calculó un índice de precios del cuero integrado por las subseries de los cueros de buey, yeguarizo, y vaca, que los promedió con el término medio de los índices de los otros productos. En su lugar, en nuestra serie de precios del cuero la información se encuentra desagregada en cueros de toro y novillo. Cada una de las mismas se encuentra a su vez desagregada a comienzos del siglo XVIII a tenor de la dimensión de cada unidad (largo por ancho) en varas, y a partir de mediados del mismo siglo a tenor del peso en libras castellanas. De un total de 604 cueros vacunos obtenidos en una vaquería practicada en la Banda Oriental se obtuvieron a fines del siglo XVIII 247 cueros de 40 libras o el 41%, 169 de 35 libras o el 28%, 94 de 30 libras o el 16%, y 94 de menos de 30 libras o el 16% (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.6, Exp.120).

Para prolongar la línea que ilustra la tendencia de este fenómeno particular, debemos adoptar entónces como supuesto las proporciones mencionadas, aunque estén apoyadas en una fuente que atañe a una sola parte de la región rioplatense. En efecto, extrapolando para el resto de la estadística anual de cueros exportados la distribución de cueros por escala de peso hechos en una corambre específica de un año en particular, estaremos en condiciones de justipreciar el valor verdadero de las exportaciones de cueros hasta hoy conocidas. La Tabla ilustra estos mismos valores.

<sup>4860</sup> Hilferding, 1985, 164.

<sup>4861</sup> Ignoramos si este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las oscilaciones del precio del cuero.

<sup>4862</sup> AGN, Sección Tribunales, Protocolos, Registro 5, 1772, fs.96, 112v., 109v., 152v., 166v., y 180.

<sup>4863</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.

<sup>4864</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

<sup>4865</sup> "...respecto de que el crítico de la estación del tiempo no permite perder minuto bueno para pesar y embarcar en dichas urcas que resultaría en grande perjuicio de la Real Hacienda pesarlos en el segundo o tercer día de haber llovido por la mucha humedad que en el invierno conserva este género como en el día se vé pues después de tres días buenos de Pamperos no he permitido se pesen hoy porqué aún tiene mas de 10% los cueros de humedad de lo que ha llovido" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 696)

<sup>4866</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 8, fs. 46.

<sup>4867</sup> Gelman, 1983, 114-115; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

<sup>4868</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10; Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5, y Garavaglia, 1977,

<sup>4869</sup> Gelman, 1983, 114-115.

<sup>4870</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

<sup>4871</sup> Dos Santos, 1972, 146.

<sup>4872</sup> Kalmanovitz, 1983, 74.

<sup>4873</sup> Sala de Tourón, et. al., 1967, 156.

<sup>4874</sup> Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

<sup>4875</sup> Según Coni (1930) el Real Asiento de Inglaterra declaraba como gasto el salario de un vaquero, el cual desjarretaba a razón de \$50 (400 reales) cada mil toros, o 2/5 de real cada cuero.

<sup>4876</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1945, fs.2; y Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.7.

<sup>4877</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

<sup>4878</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

<sup>4879</sup> Porto, 1943, 207-15; y Pérez Colman, 1937, III, 79-81.

<sup>4880</sup> Assuncao, 1978, 392.

<sup>4881</sup> AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

<sup>4882</sup> AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

<sup>4883</sup> Ibidem.

<sup>4884</sup> Assuncao, 1978, 392.

<sup>4885</sup> Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, (Buenos Aires,1945), pp.112-113, citado por Barrios Pinto, 1967, 71.

<sup>4886</sup> Idem.

<sup>4887</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-13, Exp. 7, fs.16.

<sup>4888</sup> Respecto a los jornales pagados por cada cuero ver AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 120. En las satisfacciones dadas al Ramo de las Temporalidades, por cargos suspendidos a las cuentas que tenía rendidas Don Pedro Díaz de Vivar, éste declara en 1803 a nombre de María Antonia de Achucarro, viuda de Melchor de Viana, Administrador que fué de dicho Ramo, que: "Es del cargo de todo hacendado entregar al Baquero dos medias lunas para que desgarrete el animal: asimismo se le administra dos hojas de espadón con las que forman igual número de chusas para que lo acodillen y le den muerte: consiguientemente se le pasan uno o dos peones destinados de caballerizos para el cuidado de las cabalgaduras de los baqueros que estos trahen suyas propias, y mudan alternativamente pues no cualquiera sirve a ese efecto, y es urgente esté diestra y enseñada a él, por ser contingente y peligrosa esta operación: conseguida la acción de desgarretadores y muerto el animal, envían los peones a sacar la piel de él, administrándoseles los cuchillos necesarios, siendo de la obligación de este individuo el estaquearla y figurarla. Luego entra el individuo o individuos de idoneidad que se titulan Barraqueros, al recojo y reconocimiento de las pieles, si están bien acondicionadas y enjutas, y de recibo, y estándolo se le abona al peón, haciéndole conducir de cuenta del dueño de la faena a la barraca del depósito, donde también los barraqueros aprensan las pieles y acondicionan. Todo lo expuesto es indispensable y urgente, y de práctica, y para dichas operaciones el gasto de yerba mate y tabaco en rama; y si no véase los documentos referidos de fs. 476 y 477, que son los contratos" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44,

---

Exp. 1159, fs.22).

<sup>4889</sup> En las recogidas de ganado o rodeos prevalecía también una primitiva división del trabajo, según que se marcara, apartara, castrara, señalara, curara, o simplemente revisara o contara. El caballo para trabajar en rodeo también debía ser adiestrado en enlazar, echar al medio, y pechar. Cada paisano llevaba su remuda pues el continuo correr a toda rienda, pararse, tornear, pechar, aguantar cimbrones de lazo, cansaban mucho al animal. Término medio, cada yeguarizo aguantaba dos o tres horas según fuera la edad de los vacunos a trabajar, el estado de gordura, y la consistencia del suelo. Tengamos en cuenta, que como bien lo explica Terrera (1970), apartar un ternero era una cosa, y apartar novillos gordos otra; y que el cansancio de los caballos aumentara o disminuirá según la hacienda y el mismo terreno. A animales gordos y jóvenes, mayores corridas; a hacienda flaca y vieja, menor esfuerzo. Lo propio ocurre con el terreno: si esta blando será más pesado y si seco, menor esfuerzo para el caballo que trabaja (Terrera, 1970, 342).

<sup>4890</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs. 329; Leg. 29, exp. 747, fs. 17; Leg. 42, Exp. 1075.

<sup>4891</sup> Si tenemos en cuenta que por cada cuero producido que el acopiador vende a 12 reales, tuvo que desembolsar 8 1/2 reales en concepto de costos variables y 1 1/2 reales en concepto de costos fijos, habrá entonces obtenido un plusvalor del orden de los dos reales. De aquí entonces que si quisiéramos medir la tasa de explotación o proporción del valor generado por el trabajo que es apropiada por el acopiador debería de medirse la relación entre el plusvalor y el capital variable. Pero, cuando las calificaciones laborales son heterogéneas, las tasas de explotación son desiguales. Estas habrían de medirse entonces dividiendo el plusvalor generado con el capital variable desembolsado correspondiente a cada categoría laboral incorporada en el producto final.

<sup>4892</sup> El flete de los cueros lo fija Azara en 1801 en cuatro reales, y Concolorcorvo en seis reales desde Córdoba, desde Santa Tecla costaba cinco reales, desde las puntas del Tacuarí costaba 2 1/2 reales, descendiendo a medida que las distancias se acortaban (Sala de Touron, et. al., 1967, pp. 71 y 62-63). De aquí que, el costo del flete estaba en relación directa con la distancia entre el lugar de producción del cuero y el punto de salida. Donde por la distancia extrema, el costo del flete se devoraba las eventuales ganancias, como era el caso del Tucumán o Cuyo, el cuero se lo procesaba en curtiembres, como materia prima para la fabricación de suelas y cordobanes. El flete fluvial a través de lanchones desde Paysandú o Arroyo de la China hasta Buenos Aires, alcanzando promedio entre real y real y medio por cuero (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, Exp. 1038, fs. 2.) y el flete marítimo de Buenos Aires a Cádiz, fluctuaba desde cuatro reales plata por cuero de 35 libras en tiempo de paz, hasta veinte reales plata en tiempos de guerra (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10.).

El recargo del flete en las carretas y luego el de una navegación larga eran inconvenientes muy grandes que no podían remediarse dado el bajo valor relativo del grano. El alto costo del flete para los que sembraban en tierras realengas, alejadas de los centros urbanos, hacía que muchos labradores prefirieran afrontar el pago de arrendamientos en tierras próximas a los centros poblados, antes que migrar a la frontera. El pago del arrendamiento rural estaba expuesto también en ese entonces al mecanismo de la renta diferencial. Este mecanismo, en lugar de funcionar con el precio de venta del cuero, operaba a través del precio del arrendamiento. El costo del arrendamiento de la parcela más próxima regulaba los arrendamientos y por consiguiente la rentabilidad neta de todas las otras parcelas de los alrededores. El arrendatario de la parcela más próxima consideraba que podía obtener un beneficio equivalente, pagando un arrendamiento mayor que el que pagaban los arrendatarios de parcelas más alejadas de Buenos Aires. Estos últimos se veían pronto obligados a pagar similares arrendamientos, aunque no estuvieran en condiciones de hacerlo por el alto costo del flete, y aún cuando al continuar subiendo los arrendamientos les privara de todo su beneficio. Algunas parcelas muy alejadas se abandonaban por completo, y otras, al no suministrar renta, y sí un corto beneficio, únicamente podían ser explotadas por sus propietarios. Ya en 1635 Diego de Roxas Briones, quien también adquiriera una regiduría, arrendó una chacra en el pago de Monte Grande (actual San Isidro) de manos de Domingo Griveo, el tutor de los hijos de Isidro Cebrián, por el término de cinco años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.21, fs. 401). La extensión del contrato de arrendamiento afectaba también el nivel de las inversiones. Cuanto más largo era el contrato, mayor era la oportunidad de evitar un incremento en el pago del arrendamiento, posibilidad ésta que podía revertir en cierta clase de inversión. El chacarero que logró arrendar una chacra por el período más extenso fué Diego Freire en 1636. Freire arrendó a Domingo Santos una chacra en Monte Grande en \$10 anuales por el término de diez años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.22, fs. 477). También en este mismo período se registró una intensa especulación en tierras de "pan llevar", al extremo de incrementarse su renta más del 100% en menos de una década. Lamentablemente los archivos notariales guardan muy pocos ejemplares de estos contratos. La mayoría de estos contratos se

---

registraban en la Alcaldía de Hermandad (Justicia de Paz). Por ejemplo, en 1630 una chacra fué arrendada en \$20 anuales por el término de cuatro años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v. 16, fs. 252). Diez años mas tarde, en 1640, Isidro Cebrián de los Cobos arrendó una chacra mas chica en Monte Grande a Juan de Pintos en \$50 por el término de un año. Supuestamente, aquellos terratenientes que no eran capaces de operar sus chacras por sí mismos elegían arrendarlas o darlas en aparcería antes que venderlas. Pero estos arrendatarios tampoco solían ser los productores directos pues, por lo general, se trataba de comerciantes que a los efectos de la producción agrícola contrataban mano de obra asalariada. Por ejemplo, Diego de Roxas Briones, el arrendatario citado, no trabajaba su tierra con su propia fuerza de trabajo familiar. En cambio, Roxas trabajó su chacra empleando entre 1635 y 1638 seis trabajadores indígenas (Saguier, 1986, Tabla 3). No obstante esta aparente relación social capitalista Roxas Briones fracasó en volverse un auténtico arrendatario capitalista. Este fracaso era debido a la imposibilidad de disminuir la renta fundiaria y en super-explotar el trabajo indígena. Más aún, cuando los precios del trigo y la harina cayeron debido a la quiebra de relaciones con Portugal y sus colonias, las ganancias también cayeron. Como la tasa de ganancia media disminuyó drásticamente los arrendatarios no pudieron pagar ni la renta ni los salarios de los indígenas. Consecuentemente, los terratenientes debieron comenzar a trabajar las tierras por sí mismos. (Acerca de las razones del fracaso de una típica clase arrendataria en el Buenos Aires colonial, ver Manso, et. al., 1983, 33).

<sup>4893</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

<sup>4894</sup> En su correspondencia con el Virrey Loreto del 12-IX-1781, Juan Angel Lazcano asegura que en la faena que se hacía de ganados misioneros en la Banda Oriental "...pasaban de mil hombres los que empleaba en hacer faenas de cueros" (Pereda, 1938, 188-218, citado por Pivel Devoto, 1957).

<sup>4895</sup> Garavaglia, 1983, 84.

<sup>4896</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 23, Exp. 555, fs.55.

<sup>4897</sup> *Ibidem*,

<sup>4898</sup> *Ibidem*,

<sup>4899</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 9, fs. 50v.

<sup>4900</sup> Levene, 1962, 328.

<sup>4901</sup> Coni, 1930.

<sup>4902</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 38, Exp. 973, fs. 5.

<sup>4903</sup> Pivel Devoto, 1952,1957, 30; Brito Stéfano, 1953, 331, 339, 356, 358-59 y 365; y Sala de Tourón, et. al., 1968, capítulo IV.

<sup>4904</sup> Hijo de Francisco Pacheco y Ceballos y de Joaquina Martín Camacho; hijastro de Antonio Fernández de Bobadilla; marido de Dionisia Obes; con cuñado del miembro de la primer Corte de Justicia Julián Alvarez, de Nicolás Herrera, del Comandante Bernardo Bonavía, de Juan A. Gelly, de José Ellauri, y del Sargento Mayor Luis Perichón; y suegro del Diputado Benito Chain Troitiño (Goldaracena, 1976, 184 y 195; y Fernández de Burzaco, V, 104).

<sup>4905</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.44, Exp.11.

<sup>4906</sup> Gomensoro, 1950, 398-432; y Marilúz Urquijo, 1952, 53-93.

<sup>4907</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.110, Exp.2817.

<sup>4908</sup> Pivel Devoto, 1952,1957, 31.

<sup>4909</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 64, Exp. 1730.

---

<sup>4910</sup> ver Saguier, 1992.

<sup>4911</sup> Mauro, 1964, 307.

<sup>4912</sup> por su condición colonial el Río de la Plata carecía de la soberanía monetaria necesaria para fijar la oferta dineraria interna, para envilecer la moneda de plata con cobre, y para reducir la tasa de interés de los censos contraídos; así como carecía de la soberanía fiscal necesaria para sustituir mediante un proteccionismo tarifario las importaciones de mercancías con alto valor agregado por mercancías con menor valor agregado, y para desgravar la producción de manufacturas.

<sup>4913</sup> Gómez Camacho, 1986, 45.

<sup>4914</sup> Torres Gaytán, 1972, 381, 390, 394, y 398.

<sup>4915</sup> Wilson y Parker, 1985, cap. II.

<sup>4916</sup> Halperin Donghi, 1979, 109.

<sup>4917</sup> Kalmanovitz, 1983, 69.

<sup>4918</sup> Idem, p. 68.

<sup>4919</sup> Vitale, 1986, 15.

<sup>4920</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.

<sup>4921</sup> Halperin Donghi, 1979, 74. Sobre el Consulado de Comercio de México, ver Del Valle Pavón, 2002 y 2003.

<sup>4922</sup> Balmori, 1979.

<sup>4923</sup> Mastías de Abaroa y Barrena remesa \$82.576; Diego de Agüero \$37.791; Cristóbal de Aguirre \$29.422; Jaime Alsina \$24.489; Joaquín de Arana \$17.853; Manuel de Arana y Torrezuri \$101.551; Vicente de Azcuénaga \$18.839; Isidro J. Balbastro \$10.401; Manuel de Basavilbaso \$66.567; Francisco J. Díaz Vélez \$12.943; Pedro Díaz e Vivar \$11.317; Juan Bautista de Euba \$14.850; Juan Bautista de Gainza \$15.301; Antonio García López \$30.285; Luis Gardeazábal \$41.842; Jose González de Bolaños \$55.807; Pedro González de Cueto \$27.860; Bernardo Gregorio de las Heras \$14.435; Bernardo Sancho Larrea \$67.468; Eugenio Lerdo de Tejada \$67.238; Casimiro Francisco de Necochea \$29.393; Manuel de Nobales y Aspiunza \$28.212; Antonio de Obligado \$44.259; Pablo Ruiz de Gaona \$35.361; Miguel Sáenz \$17.335; Gaspar de Santa Coloma \$18.200; Martín de Sarraeta \$57.744; Francisco Ignacio de Ugarte \$87.914; Manuel J. Zapiola \$17.748; Miguel de Zuviría \$28.813; y Joaquín Pinto, Agustín Casimiro de Aguirre, Juan Estéban de Anchorena, Juan Antonio de Lezica, Manuel Rodríguez de la Vega, y Francisco de Seguro las increíbles sumas de \$149.320, \$124.865, \$103.413, \$271.745, \$177.643, \$107.621 respectivamente (Fuente: Cuadro A-III del Tomo I de esta obra).

<sup>4924</sup> Bakewell, 1976, 319.

<sup>4925</sup> de Ramón, 1978, 170, 172.

<sup>4926</sup> En conducir sus muebles a Potosí Rafael de los Reyes y Serrano le relata a José Antonio de Alzaga en marzo de 1769, "...hice una gran ventaja porqué gané un 100%, pues habiéndome costado las sillas a \$13 1/2 y servíome de ellas más de 10 años,...las vendí a \$26 1/2 a Don José de Elorga; que la cuja que costó \$200 la vendí al dicho por \$400; que los espejos que me costaron \$300 los vendí por \$500 a Alvarez; que el Relox de Cuerpo entero que me costó con su caja \$100, por ser de pesas con cuerda de 24 horas, lo vendí a Velarde en cambalache en cosa que valía \$300; y a este tenor todo lo demás con que antes fué negocio favorable a mí, el tren que me supone; y así siempre que yo conociese que de un lugar a otro había de reportar tan crecidas ventajas llevaría triplicado y cuatriplicado tren, a cualquier parte que fuese mas que me expusiera a la censura

---

de Warnes y todo el mundo" (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 50v.).

<sup>4927</sup> Arias Divito, 1976, 10

<sup>4928</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 6, fs. 54v.

<sup>4929</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. H-1, Exp. 11.

<sup>4930</sup> Idem.

<sup>4931</sup> Idem.

<sup>4932</sup> Idem.

<sup>4933</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Q-2, Exp. 8, fs. 61.

<sup>4934</sup> Idem.

<sup>4935</sup> Idem.

<sup>4936</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 430.

<sup>4937</sup> Idem.

<sup>4938</sup> Villalobos, 1990, 110.

<sup>4939</sup> tío o primo de Francisco Ignacio de Ugarte.

<sup>4940</sup> En viaje al Paraguay y Corrientes había contraído deudas en 1756 con Juan Antonio Ximenez Braga (AGN, Protocolos, Reg.1, año 1756, fs.39). y en 1768 con Manuel Antonio Warnes (AGN, Protocolos, Reg.2, año 1760, fs.213; y Reg.2, 1760, fs.220).

<sup>4941</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>4942</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>4943</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 21-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>4944</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-III-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>4945</sup> Schumpeter, 1984, 326.

<sup>4946</sup> Céspedes del Castillo, 1946, 806.

<sup>4947</sup> Idem, p.133.

<sup>4948</sup> Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

<sup>4949</sup> Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

<sup>4950</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>4951</sup> Saguier, 1991.

---

<sup>4952</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>4953</sup> Saguier, 1991.

<sup>4954</sup> No obstante su condición de miembros de un estamento, los vecinos encomenderos revelarían --en los conciertos de indios celebrados entre regiones geográficamente apartadas entre sí-- la existencia de una intensa movilidad, estrecha interdependencia y capacidad de transformarse en hacendados (permítaseme citar a Saguier, 1993).

<sup>4955</sup> Peña, 1983.

<sup>4956</sup> Ver Saguier, 1988, 1990 y 1993.

<sup>4957</sup> Collini, Winch y Burrow (1987) desarrollan el llamado ciclo de corrupción en analogía al apogeo y caída del imperio romano (Collini, Winch y Burrow, 1987, cap. VI).

<sup>4958</sup> Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

<sup>4959</sup> Comadrán Ruiz, 1959, 82; Acevedo, 1965, 127, 186-187, y 505; y Fisher, 1981, 201. Según Fernandez Alonso (1991), tanto Moore como Lynch y Comadrán Ruiz sostienen, a diferencia de Fisher y Acevedo, que la intervención de los Gobernadores-Intendentes supuso una grave pérdida de terreno para los Cabildos (Fernández Alonso, 1991, 518).

<sup>4960</sup> Acevedo, 1965. 187.

<sup>4961</sup> Fisher, 1981, 201.

<sup>4962</sup> Socolow, 1987, 160.

<sup>4963</sup> No es de descartar que el régimen patrimonial se perpetuara aún luego de la Revolución si tenemos en cuenta que aún en Francia, pese a la Revolución, Runciman (1983) concluye que "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

<sup>4964</sup> Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141.

<sup>4965</sup> Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128.

<sup>4966</sup> fundados implícitamente en los juicios de Weber (1922); Kofler (1948, 1974) y Anderson (1974) en sus aportes acerca de la venta de cargos; y Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizaron el Perú colonial tardío.

<sup>4967</sup> Sánchez Bella, 1989, 447.

<sup>4968</sup> Moreno Cebrián, 1976, 228.

<sup>4969</sup> Parry, 1953, 33-47, citado por Lynch, 1967, 216, nota 8. La innovación de hacer a los oficios vendibles también renunciabiles fué copiada aparentemente de Francia, donde por el procedimiento ideado por Paulet los oficios vendibles "...se volvían hereditarios por un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra, medida destinada a aislar a la burocracia de la influencia de los potentados" (Anderson, 1979, 91).

<sup>4970</sup> Golte, 1980, 206.

<sup>4971</sup> Choy, 1985, 206.

<sup>4972</sup> Peralta Ruiz, 1991, 149.

<sup>4973</sup> Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

---

<sup>4974</sup> De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

<sup>4975</sup> Trimberger, 1978, 439.

<sup>4976</sup> Trimberger, 1978, 440.

<sup>4977</sup> Véliz, 1984, 92.

<sup>4978</sup> Padgett y Ansell, 1993, 1308.

<sup>4979</sup> Burrow, 1987, 214-216.

<sup>4980</sup> El cobro de la Sisa correspondía a los Oficiales Reales de la Real Hacienda o en su defecto a sus Tenientes. Dichos Oficiales Reales ejercían su cargo en la sede de la Tesorería de las Cajas Reales que se hallaba primero en Jujuy y luego en Salta, y el Teniente de Oficial Real en su subsede que se hallaba en Córdoba. En Jujuy, sus principales funcionarios lo fueron el Contador Gaspar Lozano, y el Tesorero Manuel Sánchez de Bustamante (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). En Salta lo fué Gabriel Güemes Montero, padre del prócer Martín Miguel de Güemes. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el cobro de la Sisa era arrendado por la Real Hacienda al mejor postor. El proceso de cambio del sistema de arrendamiento por el de administración real varió en su cronología según la riqueza del lugar. En el Río de la Plata dicho proceso se inició con muchos años de retraso respecto a los Virreinos del Perú y la Nueva España. En México, dicho proceso se realizó en el espacio de 20 años (1756-1776), y en Quito entre 1765 y 1787 (Fernández Martínez, 1984, 47). En Córdoba, la Sisa seguía arrendándose en 1770 al Maestre de Campo Don José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, adquirida a las Temporalidades, quien fuera marido de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Rodríguez fué el padre del jurista Victorino Rodríguez, ajusticiado en Cabeza de Tigre, de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiola, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Saa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral Justo Juan Rodríguez (LC, I, 336). Igualmente, en Santa Fé, el Real Derecho de Alcabala de tierra seguía arrendándose en 1792 en Juan Mejía por tiempo de tres años (AGN, Caja de Buenos Aires, Legajo 15, Asiento 1, Sala XIII, 14-1-2). Cabe señalar que no debe confundirse el cargo de Teniente de Oficial Real, que pertenecía a la Real Hacienda, con el de Teniente de Rey. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente Gobernador, y desempeñaba según Zinny sólo funciones militares.

<sup>4981</sup> Punta, 1988, 10. En 1768 el Cabildo de Córdoba se quejaba al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos (Punta, 1988, 13-14). En los autos obrados en 1782 por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un grave caso de defraudación. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269). Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas Nicolás García Guilleto, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado a los Propios este derecho (Saguié, 1989a, 283). También observaba con asombro en 1786 Don Gabriel Güemes Montero al Gobernador Intendente de Salta del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de Sisa y Alcabala practicaban en Salta. En Salta del Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo teniente para que con estudiosa vigilancia inquiriese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos carecía de ejemplos (AGN, Sala IX, Hacienda,

Leg.44, Exp.1158). Asimismo, ésta era la impresión que Don Rafael María Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey en 1791 con respecto al partido del Rosario, en la provincia de Santa Fé, donde los Receptores de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.). Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos" (Ibídem, fs. 1). Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores" (Ibídem, fs. 3). De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías" (Ibídem, fs.3). También era negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la administración del ramo de Alcabalas de la provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que

"...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados y mulas que allí se consumen, y expenden, ni de otros diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio está muy propagado en La Rioja y su jurisdicción con el aumento que han tomado los salitres, que se benefician y se extraen para dicha Capital" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667).

<sup>4982</sup> El cargo de Teniente de Oficial Real fué detentado en Córdoba en la década de 1750 por Pedro Fernández de la Torre y Palacios, siendo sucedido por el que fuera hasta 1754 Alcalde Francisco Javier Garay, del clan de los Echenique. Ejerció Garay su cargo hasta febrero de 1760, en que fué reemplazado por Juan de Alberro. A su vez, este último fué reemplazado en 1764 por Francisco José de Uriarte (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). Garay fué herido de una puñalada en 1754, ejerciendo la vara de Alcalde. Era hijo de Fernando de Garay y de Josefa María de Torres y Salguero de Cabrera; marido de Petronila Molina Navarrete; cuñado del Alcalde José de Molina; hermano de Bartolina Garay, mujer del Alcalde José Santiago de Echenique y Cabrera; y padre del Alcalde Provincial Domingo Garay; de Petrona Garay, mujer del Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Alberro era casado con María del Pilar Fernández, y fué suegro de Juan Antonio de Saráchaga y de Rafael de las Casas y Arrascaeta, quien a su vez era hermano de José Miguel de las Casas, y de Petrona de las Casas, mujer esta última de Rosendo Españón, natural de La Coruña (LC, II, 134 y 135). Uriarte era casado con María Mercedes Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiola y de Teresa de las Casas y Ponce de León; prima hermana de la mujer de José de Allende y Losa; nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí; y cuñada de Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició a Uriarte un sumario para averiguación de su proceder como Teniente de Oficiales Reales (AHC, Crimen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia le inició un juicio por injurias (AHC, Crimen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por contrabandista (AHC, Crimen, 1769, Leg.22, Exp.15)

<sup>4983</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

<sup>4984</sup> Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre de Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

<sup>4985</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>4986</sup> Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicuetta, y Cipriano González de la Madrid.

---

<sup>4987</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>4988</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951.

<sup>4989</sup> Dicho pasquín se halla reproducido en: José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991).

<sup>4990</sup> Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid (AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97).

<sup>4991</sup> marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427). Era el padre del prócer de la Independencia Argentina General Martín Miguel de Güemes.

<sup>4992</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer.

<sup>4993</sup> hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305).

<sup>4994</sup> Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciano de Lima (FB, IV, 52).

<sup>4995</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.S-11, Exp.28, fs.2.

<sup>4996</sup> *Ibidem*.

<sup>4997</sup> Arias Divito, 1978, I, 7.

<sup>4998</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n.736.

<sup>4999</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

<sup>5000</sup> Arias Divito, 1978, I, 32.

<sup>5001</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n. 736.

<sup>5002</sup> *Idem*.

<sup>5003</sup> Fué Conductor de los Caudales de Potosí, y Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulos 509 y siguientes). En 1778 pide permiso en Buenos Aires para remitir unos efectos (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 15, fs.247-48). En 1798 inicia una demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.55, Exp.8). El mismo año se decreta su quiebra (AGN, Comerciales, Leg.25, Exp.19). Finalmente, en 1808, se le devuelven sus bienes embargados por la quiebra que se le atribuyó al tiempo que fue Administrador de Tabacos en el Tucumán (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.576).

<sup>5004</sup> AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.

<sup>5005</sup> Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

<sup>5006</sup> Anteriormente Comandante de la Villa Real de Concepción (Romero de Viola, 1987, 135).

<sup>5007</sup> Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

<sup>5008</sup> *Ibidem*.

---

<sup>5009</sup> Bischoff, 1952; y Lobos, 1985, 227-284.

<sup>5010</sup> Miguel Gregorio de Zamalloa al Gobernador Joaquín Alós, 13-II-1788, Asunción (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2).

<sup>5011</sup> *Ibidem*.

<sup>5012</sup> *Ibidem*.

<sup>5013</sup> *Ibidem*.

<sup>5014</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>5015</sup> Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid.

<sup>5016</sup> Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes.

<sup>5017</sup> Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta.

<sup>5018</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>5019</sup> María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada.

<sup>5020</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>5021</sup> *Ibidem*.

<sup>5022</sup> *Ibidem*.

<sup>5023</sup> *Ibidem*.

<sup>5024</sup> *Ibidem*.

<sup>5025</sup> *Ibidem*.

<sup>5026</sup> *Ibidem*.

<sup>5027</sup> Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte, contrajo primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

<sup>5028</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

<sup>5029</sup> *Ibidem*.

<sup>5030</sup> *Ibidem*.

<sup>5031</sup> *Ibidem*.

<sup>5032</sup> *Ibidem*. Según la regla 29 del Reglamento del Gobernador de la Luz, del año 1803, todos los sueldos y prest de los individuos de Asamblea y Partidarios deben ser considerados gastos de Guerra y constitutivos del Ramo de Sisa (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.113, Exp. 2.905).

---

<sup>5033</sup> Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (Lazcano, 1969, III, 293). Era hermano de Domingo Ignacio León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

<sup>5034</sup> Bruno, 1967, VI, 483.

<sup>5035</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

<sup>5036</sup> Capitán de Ejército, de nacionalidad inglesa (Acevedo, 1992, 154). Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía por \$2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de \$1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M. Ol por valor de \$4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domingo Vea y Murguía por valor de \$3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de \$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

<sup>5037</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

<sup>5038</sup> falleció en 1792 (Acevedo, 1992, 149).

<sup>5039</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

<sup>5040</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg.8, Exp.9.

<sup>5041</sup> Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).

<sup>5042</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

<sup>5043</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

<sup>5044</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

<sup>5045</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

<sup>5046</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

<sup>5047</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

<sup>5048</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

<sup>5049</sup> Idem.

<sup>5050</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 10, fs. 99.

<sup>5051</sup> Idem, fs. 99v.

<sup>5052</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945fs. 202.

<sup>5053</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 36v., acápite 71.

<sup>5054</sup> Idem.

---

<sup>5055</sup> Idem.

<sup>5056</sup> Idem.

<sup>5057</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

<sup>5058</sup> AGN, Sala IX, Reales Ordenes, Libro 26, f.231.

<sup>5059</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 10, Exp. 192, fs. 13.

<sup>5060</sup> Idem.

<sup>5061</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210.

<sup>5062</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1770.

<sup>5063</sup> AGN, División Colonia, Expedientes 1800-04, Sala IX, 9-4-5, Exp.No. 97, fs. 8.

<sup>5064</sup> Idem.

<sup>5065</sup> Apolant, 1966, 570, 865.

<sup>5066</sup> Pomer, 1986.

<sup>5067</sup> Para refutar las "imposturas", Riglos aduce, entre otras excusas, que al tiempo que gobernó Robles

"...antes ni después acá aya vendido ni dejado como afirma sin                    casa, por ser opuesto a mi natural el afligir a nadie ni valerme de la autoridad de los superiores para cosa que no sea de razón".

Más aún, para justificar su inocencia de los cargos de colusión con Robles que Constanza le achaca, Riglos afirma

"...que cuando llegó a gobernar estas Provincias dicho                    Excelentísimo Sr. el año 1691 me hallaba sin deuda ninguna y tenía edificada las dos tercias partes de los cuartos que componen mi casa con el caudal procedido del fruto de mis estancias que me dauan más de mil mulas cada año y valían estas en esta ciudad en la ocasión a más de \$4 1/2 de manera                    que con ellas y los demás frutos que lograba de mis haciendas                    tenía mas de seis mil pesos de renta cada año y de su procedido en contado mas de 50 mil en plata que emplee en los géneros que me parecieron de conveniencia en los almacenes de                    Francisco de Retana [dueño de navíos de registro]". (AGN, Sala                    IX, Tribunales, Leg. C-1, Exp. 13, fs. 43).

<sup>5068</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

<sup>5069</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3.

<sup>5070</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 136, Exp.2; y Leg. 115, Exp.15; y Hacienda, Leg. 66, Exp. 1776; y Leg. 80, Exp. 2085.

<sup>5071</sup> pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.

<sup>5072</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

---

<sup>5073</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>5074</sup> Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

<sup>5075</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortiz de Ocampo.

<sup>5076</sup> Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y hermano de Domingo y de los Pbro. Andrés Nicolás y José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta.

<sup>5077</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

<sup>5078</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28, fs. 2.

<sup>5079</sup> *Ibidem*.

<sup>5080</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano, hija del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera; y cuñado de Francisca Carreño, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68; y Lazcano, 1936, I, 118).

<sup>5081</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590.

<sup>5082</sup> Hijo del Coronel Manuel Castro y de Doña Dominga Carreño Bazán, de origen riojano, y yerno de Juan de Lahoraia, comerciante avecindado en San Juan (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366).

<sup>5083</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39.

<sup>5084</sup> *Idem*, fs. 24v.

<sup>5085</sup> *Ibidem*.

<sup>5086</sup> Guzmán, 1985, 268.

<sup>5087</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

<sup>5088</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590, fs.22.

<sup>5089</sup> *Idem*, fs.23.

<sup>5090</sup> Bazán, 1973, 14, 232.

<sup>5091</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

<sup>5092</sup> *Idem*.

<sup>5093</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 98, Exp.2556, fs.10.

<sup>5094</sup> *Idem*.

<sup>5095</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998, fs.172v.

<sup>5096</sup> *Idem*, fs.173.

---

<sup>5097</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

<sup>5098</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998.

<sup>5099</sup> nacido en Urriés, España. Para sus datos de familia ver Lazcano Colodrero, 1936, I, 224.

<sup>5100</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

<sup>5101</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 63, Exp. 9.

<sup>5102</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 54, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 121, Exp. 3050.

<sup>5103</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.

<sup>5104</sup> Probablemente hijo de Francisco Zuloaga y de Ana María Gutiérrez (JR, 1987, ítem 2884.

<sup>5105</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.

<sup>5106</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.25, Exp.19, fs.30v.

<sup>5107</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, N. 1165.

<sup>5108</sup> Idem.

<sup>5109</sup> AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 514.

<sup>5110</sup> Idem, capítulo 515.

<sup>5111</sup> Idem, capítulos 516 y 517.

<sup>5112</sup> Idem, capítulos 518 y 519.

<sup>5113</sup> Idem, capítulo 524.

<sup>5114</sup> Item, capítulos 528 y 529.

<sup>5115</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.68, Exp. 1819.

<sup>5116</sup> AGN, Sala IX, Leg. 62, Exp.1630, fs. 1-1v.

<sup>5117</sup> Contrajo primeras nupcias con Dolores Pina y segundas nupcias con Dominga Moyano.

<sup>5118</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs.33.

<sup>5119</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 189, Exp. 16, fs. 110v.

<sup>5120</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427.

<sup>5121</sup> Idem.

<sup>5122</sup> Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declara en el expediente de Visita a la Tesorería menor de San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro de que las más veces ha encontrado puestas en guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en su destino lo repararán, que eso no importa nada en San Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta naturaleza (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155).

<sup>5123</sup> José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un

---

considerable perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico [Juan Manuel de Castro y Carreño] para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que los interesados sacan las correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términos de la del Tucumán sin satisfacer en esta los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que no teniendo entonces precisión de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa defraudado llevando el rematador el perjuicio de no cobrar lo que legitimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.52, Exp. 1353).

<sup>5124</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs. 110.

<sup>5125</sup> AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs. 90v.

<sup>5126</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 32, Exp. 6, 7, 10, 11, y 13; Leg. 33, Exp. 4, Leg. 34, Exp. 4, Leg. 35, Exp. 5; y Leg. 36, Exp. 25; Hacienda, Leg. 35, Exp. 895; Leg. 36, Exp. 916 y Leg. 56, Exp. 1423; Tribunales, Leg. A-15, Exp. 19.

<sup>5127</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 69, Exp. 1849, fs. 6v.

<sup>5128</sup> *Ibidem*.

<sup>5129</sup> Moreno, 1918, 180-181.

<sup>5130</sup> Saguier, 1989.

<sup>5131</sup> Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaren. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

<sup>5132</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. A-3, Exp. 13, fs. 10.

<sup>5133</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-4, Exp. 6, fs. 116 y Leg. S-6, Exp. 17, fs.25v.; y Levene, 1952, 401.

<sup>5134</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-6, Exp. 17, fs. 25v.

<sup>5135</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 101, Exp. 2642.

<sup>5136</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3. José de Beláustegui era hermano de Francisco Antonio Beláustegui, y se casó en 1782 con María Antonia de Casajús, vecina de Corrientes, hija de Bernardo Casajús y de Rosa Ruiz de Bolaños, padres de Diego Beláustegui (Labougle, 1953, 273).

<sup>5137</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 127, Exp. 3205.

---

<sup>5138</sup> Idem.

<sup>5139</sup> Entre 1693 y 1802, el Real Situado procedente del Potosí experimenta fuertes altibajos cuyos motivos obedecen a razones muy diversas. En un primer instante, que comienza en 1693, el ramo se halla con un ingreso de \$178.668, manteniendo este nivel intermitentemente hasta 1710 en que comienza una caída vertical registrando su ingreso mas bajo en 1717, con \$1403. Sin embargo, esta caída del subsidio potosino halla su compensación en el situado provincial procedente de Santa Fé (fruto del comercio de la yerba mate), que partiendo de \$40.000 en 1703, va ascendiendo lentamente hasta decuplicarse en el mismo año 1717 en que el situado potosino se hallaba en su peor momento, debido a la inundación que sufriera su ribera y la destrucción consiguiente de sus ingenios.

A partir de 1718 el situado potosino recobra los viejos tiempos alcanzando, con motivo de las hostilidades desatadas contra Inglaterra, el mismo nivel del que partió el situado un cuarto de siglo antes, pero con una diferencia a favor: las remesas dejan de ser esporádicas para tornarse estrictamente anuales. Si bien la anualidad mantiene su nivel, va decayendo lentamente hasta alcanzar su cota más baja con \$44.000 en 1731, con excepción del año anterior en que, por haberse reanudado el conflicto con Gran Bretaña por la confiscación del Real Asiento de Inglaterra, el situado ascendió a más de \$100.000. A partir de entonces, el situado remonta su nivel hasta promediar anualmente los \$80.000. Desde 1738 en adelante, el situado supera los cien mil pesos alcanzando en 1740, año de peligro de que Buenos Aires caiga en manos Inglesas, los \$262.563.

A lo largo de las décadas del 40 y 50 las remesas promedian los \$125.000. Una vez entrados a la década del 60, y en plena guerra de los Siete Años, el situado alcanza los \$385.000 en 1762 y los \$315.000 en 1763. El creciente estado de vulnerabilidad guerrera hace que Buenos Aires deba seguir pendiente del situado altoposino, pero a un ritmo siempre mayor superando en la década del 70, por primera vez el millón de pesos.

Es a partir del momento en que Buenos Aires es declarada capital de un virreinato que el Situado Real se duplica recaudando tanto en 1777 como en 1778, unos dos millones y medio de pesos. En la década del 80 el situado vuelve a su cauce natural recaudando anualmente poco mas de un millón de pesos. Luego, entrando en la década del 90, el ramo real asciende lentamente hasta volver a duplicarse en 1795 y 1800, años de serios peligros de ceder a manos enemigas.

<sup>5140</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 242, Exp. 7, fs. 32.

<sup>5141</sup> Idem.

<sup>5142</sup> Isidro J. Navarro, sobrino del Maestre de Campo Pedro Navarro, de quien hereda la posición de "Mercader de Plata", estuvo desposado con una sobrina de un antiguo Corregidor de Potosí, el Conde de Belayos. En 1745 deviene Oficial Real de las Cajas Reales de Potosí, Contador Real en 1748 (desplazando a José Palacios y Santelices), Apoderado del Presidio de Buenos Aires en 1749, y Factor Oficial Real desde 1751 a 1757.

<sup>5143</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, División Colonia, Presidio, 1724-1785, Sala IX, 27-4-6). Debo esta valiosa información a la gentileza del Coronel Ulises Muschietti, quien dicho sea de paso ha dejado inédita, con su lamentable desaparición, una inestimable recopilación de fuentes para la historia de los orígenes del ejército Argentino.

<sup>5144</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 20-V-1750 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5145</sup> Idem.

<sup>5146</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5147</sup> dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just.

<sup>5148</sup> Hijo de Juan de Lezica y María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de Ana Ortega y Carbajal, nacida en Potosí; suegro de Francisco Javier de Riglos, Pablo Ruiz de Gaona y José de Endeyza; y hermano de Juan de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144).

---

<sup>5149</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5150</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp.411, fs.23. En 1787 la gratificación fué prohibida a todos los miembros de la Real Hacienda (Socolow, 1987, 102).

<sup>5151</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5152</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5153</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5154</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5155</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5156</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5157</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5158</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5159</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5160</sup> Idem.

<sup>5161</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 13-V-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5162</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.85, fs.181.

<sup>5163</sup> Barba, 1980, 59-60.

<sup>5164</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5165</sup> Tandeter, 1980, 41, 74. El Coronel de Dragones Miguel Antonio Ezcurrechea fué Alcalde de la Santa Hermandad en 1729, Alcalde Ordinario en 1733, Situadista en 1735, propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, y auxiliar de Santelices en sus pioneros proyectos de reforma. Ezcurrechea se casa con la hija de Miguel Ondarza, arrendatario del Ingenio Trinidad o San José, y deja por única heredera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo.

<sup>5166</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 16-I-1749 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5167</sup> Quintana a Navarro, Buenos Aires, 1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5168</sup> Quintana a Saloguen, Buenos Aires, 19-VII-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5169</sup> José Manuel Angulo a Andonaegui, Santiago del Estero, 18-I-1751 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

<sup>5170</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5171</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5172</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5173</sup> Learte, 1926, 269.

<sup>5174</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 12-V-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

---

<sup>5175</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5176</sup> Uzal a Quintana, Potosí, VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5177</sup> Idem.

<sup>5178</sup> Idem.

<sup>5179</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 12-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5180</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5181</sup> Idem.

<sup>5182</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5183</sup> Idem.

<sup>5184</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5185</sup> Idem.

<sup>5186</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5187</sup> Idem. Basabilbaso, conductor del Situado de 1749 llegó a encabezar a un grupo de comerciantes porteños compuesto por Antonio de Larrazábal, Manuel Antonio Warnes, Francisco Rodríguez de Vida y Juan de Lezica y Torrezuri, adversos a los comerciantes que pretendían acentuar la influencia gaditana en Buenos Aires (Manuel del Arco, Pedro de Lea, Francisco Pérez de Saravia, Bartolomé Jacinto de Quiroga, y Antonio de Arriaga}. Para ello, Basavilbaso llegó a sugerir la creación de una diputación del Consulado de Lima en Buenos Aires, cargo que finalmente recayó en Don Antonio de Larrazábal, suegro de Don Joseph de Iturriaga (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Larrazábal otorgaba su favor al conocido contrabandista Fernando Escalada, cuya quiebra en 1753 afectó a muchos de los comerciantes avecindados en Potosí, entre ellos a Juan de la Plaza (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.E-3, Exp.13, fs. 58)

<sup>5188</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5189</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5190</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 62.

<sup>5191</sup> Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5192</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5193</sup> Ezcurrechea a Superunda, Potosí, 19-I-1754

<sup>5194</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 15-I-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5195</sup> Barba, 1980, 59-60.

<sup>5196</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 62.

<sup>5197</sup> Idem, p. 51.

<sup>5198</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5199</sup> Idem. Amén del Situado de Buenos Aires las Cajas Reales de Potosí remitían anualmente para el rescate de barras 50 mil pesos a las Cajas de Chucuito, 16 mil pesos al Corregidor de Lipez y una cifra desconocida a

---

las Cajas de Oruro, para evitar así las fraudulentas extracciones de plata sin quintar hacia el Tucumán. Los azogueros en general preferían fundir sus barras de plata en Oruro y Chucuito y no en Potosí por cuanto en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras se fundieran de hasta 220 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito. Por el contrario, en las Cajas de Potosí, desde que el Conde de Chinchón lo impuso en 1630 y lo confirmara el Reglamento del Banco de San Carlos, los fundidores no podían hacer barras de más de 130 a 140 marcos la mayor. Toda barra que excedía este peso defraudaba al fisco y merecía la pena de 100 pesos ensayados cada una. Pagándose en la Casa de Moneda de Potosí el derecho de avería de la plata producida por el número de piezas y no por peso, a razón de \$5 cada una, aquellos azogueros, aunque fueren de la Rivera de Potosí, que fundían sus barras en las Cajas de Oruro, obtenían pingües ganancias a costa del erario real (Cañete, 1952, 186). El afán del Corregidor Santelices de destinar el dinero de las Cajas Reales de Potosí a la Tesorería de la Casa de Moneda para el rescate de las barras de Oruro obedecía además a las diferencias que por ello obtenía la misma Real Hacienda. En efecto, si bien en Potosí el peso ensayado se pagaba a razón de 146 maravedíes, en Oruro se lo compraba a 143 3/4 maravedíes obteniéndose una diferencia de 2 1/4 maravedíes por peso ensayado (Cañete, 1952, 147 y 127).

<sup>5200</sup> Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5201</sup> Idem.

<sup>5202</sup> Idem.

<sup>5203</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5204</sup> Santelices a Andonaegui, Potosí, 8-I-1752 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

<sup>5205</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5206</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5207</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5208</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 19-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5209</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5210</sup> Alonso de la Vega, Marcos de Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo a Ventura de Santelices, Buenos Aires, 18-X-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>5211</sup> Urtubey a Andonaegui, Potosí, 13-XI-1754 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

<sup>5212</sup> Uzal a Quintana, Potosí, 15-XII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

<sup>5213</sup> Idem.

<sup>5214</sup> Cañete, 1952, 443.

<sup>5215</sup> En La Paz, el 11-XI-1761 dijeron que atento a constar por ella...recibió Alonso Bernardo de León desta Real Caxa para conducirlos en cinco Ramos como son:

\$119.785 pertenecientes a la Carta Cuenta de la Caja de La Paz

\$ 3.887 " " al Ramo de Azogues

\$ 2.963 " " a la Media Anata

\$ 10.811 " " a la Cruzada

\$ 500 " " a la asignación del Conde de Cancelada, que componen la referida cantidad de \$137.938 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75).

<sup>5216</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

<sup>5217</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63, fs.57v.

---

<sup>5218</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

<sup>5219</sup> Idem, fs. 65v.

<sup>5220</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

<sup>5221</sup> Idem, fs. 66.

<sup>5222</sup> Idem.

<sup>5223</sup> Idem.

<sup>5224</sup> Idem.

<sup>5225</sup> Idem.

<sup>5226</sup> Idem.

<sup>5227</sup> Idem.

<sup>5228</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

<sup>5229</sup> Idem.

<sup>5230</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 20, Exp. 468.

<sup>5231</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

<sup>5232</sup> Su patrimonio estaba constituido por la estancia nombrada Cañuma, en el Valle del Totoral, la hacienda Guaiguasi, en el Río Abajo de La Paz, la hacienda de cocalas nombrada Calacala, en jurisdicción del pueblo de Coroyco, y la hacienda Yalaca, en la jurisdicción del pueblo de Chulumani (Yungas). Acerca de la fortuna en bienes inmuebles rurales de Don Tadeo Díez de Medina (Klein, 1985, 199-226).

<sup>5233</sup> Jaime San Just al Virrey, Potosí, 18-II-1762 (AGN, División Colonia, Intendencia de Potosí, Leg. 4, Sala IX, 6-3-1).

<sup>5234</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

<sup>5235</sup> Tomás Antonio Romero al Señor Superintendente de la Real Hacienda, Buenos Aires, marzo de 1787, (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, Exp. 1056).

<sup>5236</sup> Idem.

<sup>5237</sup> Idem.

<sup>5238</sup> Casado con Francisca Cau, y padre de José Cuñado. Habiendo enviudado Francisca Cau contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde, vecino de Jujuy (Ver Cutolo).

<sup>5239</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3310.

<sup>5240</sup> Idem.

<sup>5241</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 142, Exp. 9, capítulo 509 al 513.

<sup>5242</sup> Jayme Alsina a Carlos Camuso, Buenos Aires, 4-III-1809 (AGN, División Colonia, Sala IX, 10-2-2, fs. 12).

<sup>5243</sup> Tjarks, 1959, 49.

---

<sup>5244</sup> Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250).

<sup>5245</sup> Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María Bernarda de Lezica (Fernández de Burzaco, 1987, II, 278).

<sup>5246</sup> Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (Fernández Burzaco, 1990, V, 59).

<sup>5247</sup> Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (Lazcano Colodrero, I, 28).

<sup>5248</sup> Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de Juan Martín de Pueyrredón. Ocurrido el asesinato de Pedro de Lagrava (representante de Pueyrredón) en Oruro durante la rebelión indígena de Tupac Amaru, y destruidas la totalidad de las mercaderías almacenadas en esa y otras plazas por el pillaje de los indios, Pueyrredón (padre) comisionó a Sáenz Valiente para restablecer las sucursales arrasadas, por lo que fué ascendido a representante y habilitado con ingentes remesas de mercancías. Finalmente, Sáenz Valiente se casó con la hija de Pueyrredón (Ver Cutolo).

<sup>5249</sup> Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.

<sup>5250</sup> En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

<sup>5251</sup> Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

<sup>5252</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

<sup>5253</sup> Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecochea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (Fernández de Burzaco, 1986, I, 33).

<sup>5254</sup> Casado con María Josefa Herrera, padres de José Francisco Ugarteche, nacido en Villa Rica en 1768.

<sup>5255</sup> Obligado fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta (Ver Cutolo).

<sup>5256</sup> b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (Fernández de Burzaco, 1986, I, 127).

<sup>5257</sup> Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973).

<sup>5258</sup> Contrajo con mercaderes de Buenos Aires entre 1793 y 1796 siete operaciones de fiado por valor de \$25.477 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.254v.; Reg.1, año 1795, fs.560v.; Reg.1, año 1796, fs.353; Reg.3, año 1796, fs.372; y Reg.6, año 1796, fs.337 y 329)

<sup>5259</sup> Padre de Alejandra Amatller, quien contrajo una operación de crédito en Buenos Aires en 1809 por valor de \$7105 (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1809, fs.32).

---

<sup>5260</sup> AGN, Protocolos, Reg. 1, 1783, fs. 179v.; Reg.6, 1783, fs.250; Reg. 1, 1784, 305v.,y 334; Reg.6, 1784, fs.190; Reg.4, 1800, fs.19v.; y Reg. 3, 1800, fs.159.

<sup>5261</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 17, Exp. 9, fs.9.

<sup>5262</sup> Tjarks, 1959, 63.

<sup>5263</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3146.

<sup>5264</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

<sup>5265</sup> Wallerstein, 1980, 113, citado por Garst, 1985, 473. De igual manera, el mejor indicador para medir el consenso político vigente en las nacientes repúblicas independientes es la capacidad que los gobiernos revolucionarios tuvieron para movilizar recursos con que impulsar la defensa militar contra la amenaza española, a un costo tal que no absorbiera las ganancias de la burguesía revolucionaria. Es por ello que estos gobiernos ensayaron mecanismos de defensa que implicaban premios o primas mediante patentes de corsos, participación en botines de guerra, y redistribución de bienes y tierras confiscados.

<sup>5266</sup> Assadourian, 1983, 145.

<sup>5267</sup> Imbernón, 1986, 101.

<sup>5268</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

<sup>5269</sup> Idem.

<sup>5270</sup> Idem.

<sup>5271</sup> Idem.

<sup>5272</sup> AGN, Prtocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

<sup>5273</sup> El primero en vislumbrar cómo la alcabala de reventa puede servir, en el período sometido a estudio, como barómetro para registrar los altibajos y la pronunciada declinación del capital en giro en Buenos Aires, fué Tjarks (1962).

<sup>5274</sup> Hijo de Tomás de Arroyo y Arteaga y de Ana de Esquivel; marido de Juana de Matos y Flores, hija de Juan de Matos y de María Flores de Santa Cruz (Fernández de Burzaco, I, 171).

<sup>5275</sup> A la tercera pregunta dijo que es "...cierto que tienen cantidades gruesas de frenos y espuelas que hazen en dos fraguas que tienen y save que en una ocasión vendieron al Sr. Don Domingo de Basabilbaso como mil pesos de dichos efectos y dos porciones mas la una a Don Juan de Gainza y la otra al Procurador General de Misiones fuera del continuo menudeo que tienen que es mucho" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6, Exp. 12).

<sup>5276</sup> "...que siendo cierto que los frenos y espuelas que han vendido [los Lillo] son producidos de más de 400 quintales de fierro que han beneficiado en dos fraguas que tienen; sólo les hago cargo del dicho fierro y como si todo lo hubiesen vendido en barras o planchas que al precio de \$25 quintal importa \$10.000 y su alcabala a razón del 4% importa \$400 mediante a averles entrado el año de 1742 y empezándolo a bender desde entónces". Pedro de la Gama sentencia: "...que aviendo echo el cálculo y regulación de lo que prudentemente he juzgado venden diariamente Don Francisco Lillo y su compañero José en su tienda y demás inteligencia se sirbieron V.S. y Mrds. demandar,...debo decir que dichas obras mecánicas y sus ventas están incluídas en la regulación que tengo echa, en esta forma por todas las obras mecánicas regulo a ocho pesos por la venta diaria, y por la de los demás efectos y especies de la tierra y de Castilla y las de Abasto mercantiles a \$24 por día por aver estado y estar siempre abastecida" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6,

---

Exp.12).

<sup>5277</sup> María Nicolasa Echavarría, viuda del finado Pedro Villarino, Receptor que fué del Real Derecho de Alcabala en el Puerto de las Conchas, declara que a su marido "...le estaba asignado el 30% hasta Diciembre de 1782, y que de allí adelante el sueldo de \$400 al año" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp.573).

<sup>5278</sup> Escobedo, 1976, 267.

<sup>5279</sup> AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.37, fs.395v.

<sup>5280</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2. Era nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

<sup>5281</sup> Punta, 1988, 14 y 23.

<sup>5282</sup> AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

<sup>5283</sup> No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

<sup>5284</sup> Idem.

<sup>5285</sup> Ibidem.

<sup>5286</sup> Ibidem.

<sup>5287</sup> Ibidem.

<sup>5288</sup> Idem.

<sup>5289</sup> Idem.

<sup>5290</sup> Idem.

<sup>5291</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

<sup>5292</sup> Ibidem.

<sup>5293</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>5294</sup> Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita Ledesma, cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima política del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).

<sup>5295</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>5296</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

<sup>5297</sup> Ibidem.

<sup>5298</sup> Ibidem.

<sup>5299</sup> marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

<sup>5300</sup> En el Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo teniente para que con estudiosa vigilancia inquirese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos carecía de ejemplos. En iguales términos se asustaron los tenderos, que en pulperías, y tiendas revenden el vino, aguardiente, ropa, azúcar, chocolate, tucuios, coca, y otros efectos mercantiles, porque nunca creyeron deben pagar aquel derecho sagrado persuadidos que la primera satisfacción que hizo el introductor con la primera venta, hera cuanto a S.E. se le debía, mirándose por esto libre de toda responsabilidad, por las demás untos echos de aquellos mismos efectos que han transferido dominio, y se han hecho con ellos nuevo comercio.

Es incesante así en la Ciudad como en toda la basta jurisdicción del Tucumán el cambalache que hay dando efecto de Castilla por los terrestres; pero tampoco de esto se ha cobrado jamás Alcabala entusiasmados en que sería del Real desagrado semejantes exacciones. Dos tercias partes de los avitantes tucumanos, afianzan su subsistencia con las ventas continuas de pellones, ponchos, fresadas, tablazón, suelas, y carretas. Algunas con crías de vacas, y yeguas, otros con mansaje de bueyes, por último todos o quasi todos viven en varios trajines, propios de aquel clima y terreno: pero de nada de esto, al paso que es tan justa la exacción del derecho de Alcabala, ninguno absolutamente la paga, ni nunca la ha satisfecho.

Ay muchos que se dedican a leer las leyes recopiladas, para reclamar quanto juzgan pueden serles útil pero quando llegan a las del Título 8, Libro 8 las pasan sin verlas, y el más curioso aunque las lea no las entiende o no quieren entenderlas, y así se ve que aún reconvenidos para que paguen lo que a S.M. deben se resisten con expresiones dignas sino de castigo al menos reprehensibles. Durante mi estada en el Tucumán el actual nuevo Ministro en virtud de mis particulares ynstrucciones, quiso entablar esta clase de cobranzas tomandolas por partes, y con medios suaves para introducirlas, pero las particulares circunstancias que se presentaron a la vista tuve por conveniente desentenderme de todo hasta que en vista de mis representaciones V.S. resolviese quanto estimase mejor" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.44, Exp.1158).

<sup>5301</sup> Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid.

<sup>5302</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer.

<sup>5303</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

<sup>5304</sup> Idem, fs. 1.

<sup>5305</sup> Idem, fs. 3

<sup>5306</sup> Idem, fs. 3.

<sup>5307</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667.

<sup>5308</sup> Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar". El juez Don José Fontesli "...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro, éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi si a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384).

<sup>5309</sup> AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

<sup>5310</sup> Idem.

<sup>5311</sup> Idem, fs.111.

<sup>5312</sup> Idem, fs.110.

<sup>5313</sup> Idem, fs.110

<sup>5314</sup> Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declaraba en el expediente de Visita a la Tesorería menor de San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro [Carreño] de que las más veces ha encontrado puestas en guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en su destino lo repararán, que eso no importa nada en San Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta naturaleza (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155). Acerca de la producción de aguardiente sanjuanina exportada al Alto Perú, ver Garavaglia, 1987, 58.

<sup>5315</sup> En 1793, en los autos sobre la posesión del empleo de Teniente Ministro de la Real Hacienda que a nombre de Fernando de la Rosa iniciara Juan de Almeira contra Juan Manuel de Castro Carreño, el letrado patrocinante Juan José Castelli aclaraba que "Aquí tenemos que notar muchas cosas; la primera, que las guías de aguardiente para la jurisdicción eran en tanto número que excedían su consumo; la segunda, que ni aún la quincuagésima parte de los que entraban a Córdoba constaban de guía; y lo tercero, que no se ocultaba a Castro así el perjuicio inferido al ramo de Sisa por este fraude, como también que para cometerlo se balian del advitrio de sacar con nombre de vino las cargas de aguardiente. Ahora pues, si al tiempo de registrar los caldos que se extraían le era tan fácil advertir este fraude ¿cómo dió lugar a que su continuación causase el grave perjuicio de no equivaler los aguardientes que salían para Córdoba con guía, a la quincuagésima parte de los que en ella y su jurisdicción se consumen al año? No es esto justificar las aserciones juradas de los dependientes del resguardo, que aseguran haver advertido a Castro de semejante fraude, y que no puso remedio por el motivo que queda expuesto? Que mucho...que los que disfrutaban de este delincente disimulo clamen con furor que Castro sea repuesto como el mismo lo asegura? El interés, pero un interés con daño de un tercero tan privilegiado como es el Ramo de Sisa, es el que a grangeado a Castro amigos y parciales que en el furor de ver estancada la fuente de sus utilidades claman que vuelva a correr por su cauce. Pero no se crea que Castro dispensaba esta gracia en general e indistintamente a cualquiera del vecindario: No Señor; sus parciales eran los únicos que las disfrutaban y por eso ellos son también los únicos que an sacado la cara después de su separación" (AGN, Tribunales, Leg. 115, Exp. 19, fs.379).

<sup>5316</sup> José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un considerable perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que los interesados sacan las correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términos de la del Tucumán sin satisfacer en esta los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que no teniendo entonces precisión de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa defraudado llevando el rematador el perjuicio de no cobrar lo que legitimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 52, Exp. 1353).

<sup>5317</sup> Imbernón, 1986, 104.

<sup>5318</sup> La recaudación de la Aduana de Buenos Aires pasa por diversas fases marcadas por los acontecimientos guerreros. Un primer momento que empieza en 1768 con la recaudación de \$65.982 es seguido por un lento descenso que llega a su punto más bajo en 1776 con \$13.615. Luego en 1778 se cuadruplica alcanzando la cifra de \$53.725. Como consecuencia del Decreto de Libre Comercio al año siguiente la recaudación de la Aduana monta casi los \$300.000. Pero con la guerra desatada, el ramo sufre un embate lógico cayendo languidamente hasta reducirse en un 50% en 1782. Con la Paz de Versailles en 1783, la Aduana supera los cuatro centenares de miles de pesos de recaudación, y tres años más tarde, en 1786, el ramo alcanza su apogeo con \$661.662. A partir de entonces los ingresos de Aduana no sufren altibajos significativos, pero con el recrudecimiento de la guerra, el ramo cae abruptamente de los \$400.000 en 1797 a los \$192.105 en 1798. Al año siguiente el ramo remonta su anterior estado para alcanzar en 1802, con la Paz de Amiens, la cifra de \$656.195. Dos años más tarde, en 1804 y 1805 la Aduana de Buenos Aires supera por primera vez el millón de pesos.

<sup>5319</sup> Mariluz Urquijo, 1987

<sup>5320</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 134, Exp. 3387, fs. 45.

<sup>5321</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 33, Exp. 864, fs. 132v.

<sup>5322</sup> Idem, fs. 133v.

---

<sup>5323</sup> Idem, fs. 134.

<sup>5324</sup> Idem, fs. 135.

<sup>5325</sup> Levene, 1952, 428 y 465; y Santamaría, 1982.

<sup>5326</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 264., cit. por Santamaría (1982).

<sup>5327</sup> Idem.

<sup>5328</sup> Idem.

<sup>5329</sup> Idem.

<sup>5330</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 6, fs.12, cit. por Santamaría, 1982.

<sup>5331</sup> Idem.

<sup>5332</sup> Santamaría, 1982.

<sup>5333</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 71, Exp. 1890.

<sup>5334</sup> Francisco Ximénez de Mesa denuncia en un desconocido documento que "...casi todos los que vienen de España en el día con sus géneros y frutos, menudena por varas, libras, y francos, haciendo de unos que debían ser almaceneros, en donde lo mas que como tales se les puede permitir vender son por pieza, arroba, o barril, otras tantas tiendas, queriendo gozar el privilegio del comercio en mayor pagando sólo 3% de Alcabala por las tarifas del Reglamento (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

<sup>5335</sup> "El caso es, que el bien que les resulta a los Comerciantes de España en el referido menudeo, es momentáneo y accidental, porque por el se privan de la venta en mayor, que para revender les compran los tenderos, y haciendo ellos el comercio, que estos, mal pueden comprarles, sino les ha de resultar utilidad en el menudeo. Los Catalanes con los caldos hasta forman baratillos, y las pulperías, que pagan los derechos de composición y alcabala, perecen" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

<sup>5336</sup> Julián Gregorio de Espinosa, uno de los comerciantes de mayor giro en Buenos Aires le adelantaba en 1758 a José Rodríguez, residente en Montevideo, \$2357 en mercaderías para vender en la Banda Oriental con la condición "...de que no se mezclara en tratos ilícitos por cuanto si eso pasara y llegara ello a los oídos del acreedor sería la primer excusa para quitarle el manejo de la tienda" (AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 3, años 1757/58, fs. 756v.).

<sup>5337</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs.120.

<sup>5338</sup> Francisco Ximénez de Mesa a José del Pozo, Buenos Aires, 1786, (AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 33, Exp. 4, fs. 20).

<sup>5339</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs. 120.

<sup>5340</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 184, Exp. 1.

<sup>5341</sup> Idem, fs. 103.

<sup>5342</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 84, Exp. 2176, fs.77.

<sup>5343</sup> Petit, 1986, 49.

<sup>5344</sup> Learte, 1926, 176.

<sup>5345</sup> Ibidem.

---

<sup>5346</sup> Bazán Lezcano, 1974, 329.

<sup>5347</sup> Idem, p. 373.

<sup>5348</sup> AGN, Protocolos, Reg. 2, 1772, fs. 34v.; y Reg. 3, 1773/74, fs. 112; 1790, fs. 31v.; 1784/89, fs. 277, 296, y 297.

<sup>5349</sup> AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; y Tribunales, Leg. 88, Exp. 29, fs. 74-91v, 191-199, y 246-270v.

<sup>5350</sup> Tjarks, 19 , 381-400.

<sup>5351</sup> Pedro José Berbel, a nombre de los comerciantes de esta Capital, que hacen el tráfico de negros declara el 13-II-1801 que "A mas de estos vicios padece otro muy principal aquella decisión, y es el de la desigualdad con que se grava la contribución contra la expresa voluntad de la ley que tratan de esta materia de averías, y mandan que se echen sueldo a libra, esto es a prorata de intereses, pero los que votaron por la contribución tuvieron buen cuidado de que sobre ellos no recaiese, pues no teniendo ellos barcos propios, ni haciendo giro de mar durante la guerra, no tuvieron reparo en gravar los barcos en cuatro por ciento por tonelada, y la introducen durante la guerra en un 4% y 2% en la extracción, a rebajar un 1/2% a la publicación de la paz, y todo esto con exclusión de la plata y oro, con lo que echaron todo el peso de la contribución sobre otros agravando los males de la guerra.

Pero con todo que estaba manifiesto este egoísmo y de que sólo se trataba de hacer pagar el exorbitante impuesto a los que tienen naos, y hacen durante la guerra un arriesgado comercio, incómodo a los mercaderes que en el día puedan llamarse terrestres, pues el giro de los mercantes no permite subir los géneros de Europa al extremo precio que apetecieran ni por consiguiente baxar los cueros del país al ínfimo valor a que llegaron en la pasada guerra en que con todo de ser nuestra la superioridad en la mar, y de menor duración, se compraban los cueros a seis reales y en este se venden en el día a once y a doce! con todo esto digo, los comerciantes negreros nunca creieron, que este impuesto se estendiese a la esclavatura, por ser este un comercio privilegiado y extraordinario hasta que a la entrada de alguna partida de esclavos se ha exigido, y cobrado este derecho a Juan Tomás Balanzátegui, y a Juan de Silba Cordeiro, el cual echo pone a todos los interesados en la necesidad de ocurrir a la Suprema Justificación de V.E. para que se sirva contener tan abusivo exceso (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.22, Exp.11, fs.6).

<sup>5352</sup> El caso consistía en que el Alcalde de Santo Domingo Soriano mandó retener en poder de Julián Gregorio de Espinosa \$300 para pago de las costas que adeudaba Juan Benavidez, (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26).

<sup>5353</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26, fs.52v.

<sup>5354</sup> Idem.

<sup>5355</sup> Idem., fs. 30.

<sup>5356</sup> Idem.

<sup>5357</sup> Idem.

<sup>5358</sup> Idem., fs. 30v.

<sup>5359</sup> Idem.

<sup>5360</sup> Idem.

<sup>5361</sup> Acuerdo del 4-I-1809.

<sup>5362</sup> Tjarks, 1962, 486.

<sup>5363</sup> Saguier, 1989.

---

<sup>5364</sup> Acuerdo del 4-I-1809.

<sup>5365</sup> Tjarks, 1962, 486.

<sup>5366</sup> Phelan, 1967, 327; y Zabłudovsky, 1986.

<sup>5367</sup> Beneyto, 1961, 117.

<sup>5368</sup> consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior (Silva, 1968, 1030).

<sup>5369</sup> Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que se inhíba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668).

<sup>5370</sup> AGN, División Colonial, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.10v.

<sup>5371</sup> Sobre la evolución de la justicia militar en la Guatemala tardo-colonial, 1762-1821, ver Gómez, 2007.

<sup>5372</sup> Petit Muñoz, 1947, 493.

<sup>5373</sup> Acevedo, 1972, 256.

<sup>5374</sup> marido de Manuela Rodríguez de Venero y Lovatón, hija de Francisco Rodríguez Dávila, Tesorero General de Cruzada y Corregidor de Chayanta, y de Juana Venero Moscoso, nieta del Marqués de Buenavista Don Fernando Venero y Moscoso y de Leandra Ximénez Lovatón, hija del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte.

<sup>5375</sup> AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1.

<sup>5376</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.133v.

<sup>5377</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926. El Dr. Jorge del Pozo y Delgadillo, como letrado de la Testamentaría de José de Andrés Sanz aclaraba contra la opinión del Dr. José María Lara y Villanueva, sobrino del Dr. Pedro Vicente Cañete, y apoderado de Joaquín Castro e Indalecio González de Socasa, que los Inventarios a usanza militar eran diversos del fuero común porque "...los Juzgados de Guerra aborrecen las pesadeces, las complicaciones y el escribir muchos folios para buscar la verdad. Sus diligencias quando muere un militar cuio testamento o abintestato goza del fuero, son breves aorrativas y participan del fuego y actividad de los de esta profesión, y sus Ordenanzas mismas en el título once, tratado ocho enseñan el modo de los testamentos, sus privilegios, y menos fórmulas que requieren según los casos y circunstancias y la manera sencilla con que se ha de verificar los Inventarios y adjudicar las herencias" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.22). Manuel José Vélez confesó en un largo escrito dirigido al Gobernador Intendente del Alto Perú Francisco de Paula Sanz que según las reglas comunes del derecho civil el argumento de que los hijos de Sanz no deben gozar del privilegio militar debido al hecho de no ser hereditario el fuero de Guerra tiene su apariencia de razón; "...por que debiendo mudarse el privilegio con la mutación de la persona que lo gozaba, no puede tampoco transmitirse al heredero si en el no se encontrare el carácter que fué la causa de constituir el fuero del Difunto [Carlebal, tit.1, Disputación 2a, n.389, fol.90]. Y conforme a este principio el Layco que se haia entregado de los bienes del clérigo difunto como heredero suio debe ser recombenido en el fuero secular y no en el eclesiástico por que siendo personal el privilegio de inmunidad que gozó el clérigo feneció y quedó extinguido con su muerte [Carlebal, tit.1o. Disputación 2a., n.328, fol.81]" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.22v.). Respecto del fuero militar que concede la facultd de hacer testamento militar, ver Abásolo, 1991, 404.

<sup>5378</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.37, Exp.2, fs.66.

<sup>5379</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.37, Exp.2, fs.40.

---

<sup>5380</sup> *Ibídem.*

<sup>5381</sup> Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2).

<sup>5382</sup> *Ibídem.*

<sup>5383</sup> *Ibídem.*

<sup>5384</sup> Cada regimiento contenía cuatro escuadrones y doce compañías con alrededor de 44 oficiales y 732 hombres enlistados (Frakes, 1989, 493).

<sup>5385</sup> Hijo del Gobernador del Paraguay Fulgencio Yegros y Ledesma y de Tomasa Franco Torres; nieto del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de su parienta Angela de Franco Torres; y padre del Coronel Fulgencio Yegros (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252).

<sup>5386</sup> Asistente del Gobernador Carlos Morphy en la operación de expulsar a los Jesuitas (Rivarola Paoli, 1988a, 148)

<sup>5387</sup> Comandante de la Villa de Concepción, hijo del encomendero Ramón de Espínola y de Rosa de la Peña (Spangenberg, 1992, 378), y primo del Capitán Juan Ignacio Caballero, muerto en la Guerra de las Naranjas (Frakes, 1989, 505). Autor de "Eploración del Gran Chaco que llevó a cabo por mandato del Sr. Don Joaquín de Alós, teniente coronel de los Reales Ejércitos Don José de Espínola y Peña", editado por Blas Garay (Asunción, 1899). Fué brazo derecho del Gobernador Lázaro de Ribera (Furlong, 1954, 45). Para más información ver Molas, 1957, 96; y Cháves, 1959, 26.

<sup>5388</sup> Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2).

<sup>5389</sup> Beverina, 1935, Anexo n.1, 357-364.

<sup>5390</sup> Torre Revello, 1946, 27.

<sup>5391</sup> Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

<sup>5392</sup> Hijo de Juan Antonio San Román y Araujo, vecino de Tucumán, nacido en 1744, y de María Juana de Castro y Herrera, co-propietaria de la hacienda de Capayán; y sobrino político por parte materna de Bautista de Muruaga, de Manuel García Tagle, de Francisco Javier Ortiz de Ocampo Bazán, y de José Cristóbal e Inocencio Gordillo; y primo político del jurista cordobés Victorino Rodríguez, del Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas José Víctor Gordillo y Castro, y del Jefe de la Guarnición o Comandante de Armas Manuel José Derqui (Cutolo, I, 582; Lazcano, III, 393; Moyano Aliaga, 1983; y Serrano Redonnet, 1942, 44; y 1979, 202-213).

<sup>5393</sup> Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, titular del Mayorazgo de Tótox, y de María Aurelia de Villafañe y Dávila, hermano de Juan Amaranto Ortiz de Ocampo y del Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Milicias Teniente Coronel Domingo Ortiz de Ocampo, y sobrino carnal del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán. Casó en tres oportunidades, la primera en 1795 con Manuela de Muruaga Castro Herrera, la segunda con Carmen Dulong y Domínguez, y la tercera con Máxima Villafañe (Bazán Lazcano, 1973).

<sup>5394</sup> Beverina, 1935, 54; y Cabodi, 1950, 96. Llama la atención que Azcuy Ameghino (1988) descubra esta misma realidad sin alcanzar a citar ni a Beverina ni a Cabodi (Azcuy Ameghino, 1988, 12).

<sup>5395</sup> Era con seguridad nieto primogénito de Nicolás Bazán de Tejeda, quien a su vez era hijo del Corregidor Juan Gregorio Bazán de Pedraza, fallecido en La Rioja en 1692, y de Mariana de Tejeda y Guzmán (Martínez Villada, 1940, 46).

---

<sup>5396</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.180, Exp. 28, fs. 2.

<sup>5397</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.180, Exp. 28, fs. 2. Para más detalles de la práctica de una suerte de derecho de pernada por parte de este personaje de la vida colonial, ver el Apéndice C-I.

<sup>5398</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.17, Sala IX, 6-1-5).

<sup>5399</sup> *Ibidem*.

<sup>5400</sup> *Ibidem*.

<sup>5401</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18.

<sup>5402</sup> *Ibidem*.

<sup>5403</sup> AGN, División Colonial, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.10v. Ver Gullón Abao, 1993, 122.

<sup>5404</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5.

<sup>5405</sup> marido de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y padres de María Ignacia de Isasi, mujer primero de Estéban Montenegro, Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y luego de Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, autor de las memorias tituladas Fracasos de la Fortuna, publicadas por el R.P. Grenón (Calvo, 1938, III, 233).

<sup>5406</sup> Córdoba contaba en su ciudad y campaña, en tiempos de Sobremonte, con 77 compañías que formaban 5 regimientos con un total de 5.770 hombres (Torre Revello, 1946, 22).

<sup>5407</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32.

<sup>5408</sup> AGN, División Colonia, Comandancia de Armas, Leg.1, Sala IX, 1-8-2).

<sup>5409</sup> AGN, Sala IX, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, años 1797-1810, Documento No.115. Esta situación se acentuó con la independencia, ver Andrews (1989), capítulo VII.

<sup>5410</sup> suegro del General José de San Martín.

<sup>5411</sup> AGN, Sala IX, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, años 1797-1810, Documento No.115.

<sup>5412</sup> Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17 de mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728, y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201, Exp.2 y 3).

<sup>5413</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

<sup>5414</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.35.

<sup>5415</sup> Bruno, VI, 544. Torre Revello (1946) afirma que en Mendoza las milicias se componían de tres compañías de infantería, 18 de caballería, y una de artillería, que hacían un total de 1539 hombres (Torre

---

Revello, 1946, 24).

<sup>5416</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.4, Exp.8.

<sup>5417</sup> *Ibíd.*

<sup>5418</sup> Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

<sup>5419</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.4, Exp.8.

<sup>5420</sup> Pianetto, 1968, 13.

<sup>5421</sup> Frakes, 1989, 489-508.

<sup>5422</sup> Rivarola Paoli, 1988b, 55.

<sup>5423</sup> Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostuvo que de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

<sup>5424</sup> En 1801 fué Comandante de Armas en ausencia del Gobernador Lázaro de Ribera (Frakes, 1989, 503).

<sup>5425</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8.

<sup>5426</sup> *Idem.*

<sup>5427</sup> Por cuerpo disciplinado debía entenderse a los que tenían planas mayores veteranas, asamblea reglada y demás regimenes correspondientes. Atento a que las milicias de Buenos Aires "...no son disciplinadas, no tienen la plana mayor veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven aquartelados los Sargentos, Cabos, tambores y pifano, como viven en todas las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen estos sueldos, gratificaciones ni vestuario, como tienen en aquel caso: las milicias desta Capital no son Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le sucede lo mismo que a las desta clase en España que no tienen número fijo de individuos, sino que todos los abitantes son soldados para estar listos cuando ocurriese alguna novedad" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

<sup>5428</sup> Gaspar Munibe y Tello, Marqués de Valdelirios, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima. Testigo del matrimonio de Blas Gascon con Tomasa de Arce y Báez, viuda de Juan de Vargas Macías (Jáuregui Rueda, 1989, ítem 4241). Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de *El borracho burlado* (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

<sup>5429</sup> Beverina, 1977, 37; y Socolow, 1987, 61, 137, y 308 nota 19.

<sup>5430</sup> Ramos Pérez, 1977, 7-58; y Socolow, 1978, 115.

<sup>5431</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951.

<sup>5432</sup> Archer, 1981, 707; Archer, 1982, 141; y Mayo, 1987, 254.

<sup>5433</sup> La problemática acerca de las virtudes que deben adornar a los hombres de armas se volvió a discutir en pleno proceso revolucionario, en la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. El debate se originó en 1822 al tratar el proyecto de ley presentado por el gobierno que proponía como mecanismo de reclutamiento de los soldados destinados a la formación de las milicias provinciales el alistamiento voluntario y, en caso de insuficiencia de hombres, la formación compulsiva de contingentes. Era habitual durante esa época destinar compulsivamente a los servicios de frontera contra los indios, a los llamados vagos que no

---

tenían ocupación comprobada. En el transcurso del debate el representante Rivas sostuvo que en primer lugar se debía incorporar al servicio de las armas a "los vagos y mal entretenidos". Intervinieron algunos oradores y quedó en el ánimo de la Sala el consenso de que, efectivamente, había que alistar a "...esa porción de hombres perjudiciales sobre quienes debía recaer primero esta carga personal, y ocurrir a los vecinos honrados y de ejercicio, solamente en caso de no poder llenar las necesidades del Estado con los primeros". Pero se hizo la expresa salvedad de que no se admitirían criminales en sus filas y el artículo respectivo quedó con el agregado importante: "...se fijen en aquellos vagos a cuya repartición no manche un feo crimen". A continuación, pidió la palabra el Ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, para rebatir ese criterio, porque de ese modo "...no se hacía más que manchar la ley, produciendo una desmoralización pública que debía precaberla el legislador, y haciendo huir del servicio militar a los honrados para darse lugar en él expresamente a los vagos y mal entretenidos". Y agregó que "...el primer objeto del gobierno era sacar todas las instituciones de ese estado de abyección con que las había caracterizado el gobierno tiránico [léase modernidad absolutista]". El ejército no debía ser formado por hombres cuya norma de conducta fuera el servilismo, ni tuvieran más estímulo que el temor. La Sala decía que la importancia del soldado "...estaba en razón inversa de su servilidad, por consiguiente, que el soldado menos servil, sería el más valiente". Añadió Rivadavia que para incrementar las virtudes ciudadanas en los hombres de armas era indispensable proporcionar los estímulos capaces de crear ese honor deseado y eliminar todo aquello que había producido su degradación durante gobiernos opresores. Debíase bregar por inculcar un sentido ético y el honor que significaba defender la Patria (Buenos Aires (provincia), Honorable Junta de Representantes (1822-46): Diario de Sesiones (Buenos Aires), sesiones del 10 y 13 de mayo, y del 3 de junio de 1822; citado en Eduardo R. Saguier: "El Honor Militar", La Razón (Buenos Aires), 26-IX-1985).

<sup>5434</sup> Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53. Lamentablemente estas Actas aún continúan inéditas, aunque la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba las ha librado al público en microfilm.

<sup>5435</sup> Maeder, 1981, 105.

<sup>5436</sup> Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros Correntinos de 1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de Ignacia Maciel Cabral de Melo, prima hermana de María Ignacia Caravallo, mujer del comerciante José Antonio Mieres, y en segundas nupcias con Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don José de Acosta (AGN, Criminales, Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelión contra el Gobernador de Corrientes Manuel de Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

<sup>5437</sup> Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 12-IX-1759 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>5438</sup> Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>5439</sup> Cayetano Terán Quevedo al Gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo, Córdoba, 10-II-1771 (AGN,

---

División Colonia, Temporalidades de Córdoba. Correspondencia, 1770-76; Sala IX, 21-10-5, citado por Bruno, VI, 98).

<sup>5440</sup> pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.

<sup>5441</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>5442</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>5443</sup> Mayo Documental, VI, 334, citado por Halperín Donghi, 1979, 140.

<sup>5444</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

<sup>5445</sup> AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.12.

<sup>5446</sup> *Ibidem*.

<sup>5447</sup> *Ibidem*.

<sup>5448</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890, exp. sin foliar.

<sup>5449</sup> Correa Luna, 1918, 225.

<sup>5450</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14.

<sup>5451</sup> Socolow, 1987, 157.

<sup>5452</sup> Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

<sup>5453</sup> Morón, 1988, 189.

<sup>5454</sup> Roberts, 1938, 287.

<sup>5455</sup> Por cuerpo disciplinado debía entenderse a los que tengan planas mayores veteranas, asamblea reglada y demás regímenes correspondientes. Atento a que las milicias de Buenos Aires "...no son disciplinadas, no tienen la plana mayor veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven acuartelados los Sargentos, Cabos, tambores y pifano, como viven en todas las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen estos sueldos, gratificaciones ni vestuario, como tienen en aquel caso: las milicias desta Capital no son Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le sucede lo mismo que a las desta clase en España que no tienen número fijo de individuos, sino que todos los habitantes son soldados para estar listos cuando ocurriese alguna novedad" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

<sup>5456</sup> Beverina, 1977, 37; y Socolow, 1987, 61, 137, y 308 nota 19.

<sup>5457</sup> Ramos Pérez, 1977, 7-58; y Socolow, 1978, 115.

<sup>5458</sup> 232 dragones y 47 artilleros (Beverina, 1939, 32).

<sup>5459</sup> Lynch, 1967, 227. Sobre la revuelta indígena en el Alto Perú, ver Serulnikov, 2006. Sobre la rebelión del Inca Túpac. Amaru y el Noroeste Argentino, ver Poderte, 1997.

<sup>5460</sup> Cajías de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990-91.

---

<sup>5461</sup> Kuethe, 1979, 95; y Suárez, 1984, 168, y 199-200. Sobre la rebelión en Mina Gerais en 1789 conocida como Inconfidencia Mineira, ver Santos, 1966. Las milicias debían distinguirse a juzgar por la Real Orden del 2 de agosto de 1791 según que fueran disciplinadas o urbanas. En las provincias del Virreinato del Río de la Plata carecíamos de milicias disciplinadas por cuanto "...no tienen la plana mayor veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven acuartelados los Sargentos, Cabos, tambores, y pífano, como viven en todas las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen éstos (los Sargentos, Cabos, etc.) sueldos, gratificación, ni vestuario, como tienen en aquel caso: luego las milicias desta Capital no son Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le susede lo mismo que a las desta clase en España que no tienen número fijo de individuos, sino que todos los abitanes son soldados para estar listos quando ocurriese alguna novedad" (Archivo General de la Nación Argentina [AGN], Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

<sup>5462</sup> estos regimientos, a diferencia del Regimiento de Saboya, estaba formado por criminales reclutados en las cárceles de dichas ciudades de España (Gullón Abao, 1993, 118).

<sup>5463</sup> Beverina, 1939, 32. A causa de la dificultad de reclutar veteranos en el país el monarca autorizó al Virrey en 1783 a establecer su propia bandera de recluta en La Coruña y en 1802 en en Málaga (Beverina, 1939, 40). Para la frontera de Buenos Aires fueron redactadas en 1784 unas Instrucciones que debe observar el Cap. Pedro García, Sub-Teniente del Regimiento de Infantería de Buenos Aires en su comisión de recluta que ha de establecer en Galicia (AGN, Sub-Inspección, 1762-84, Sala IX, 28-6-2).

<sup>5464</sup> La Novísima Recopilación de las Leyes de España distingue el levantamiento o sedición (rebeliones, sublevaciones) de los tumultos o motines; y luego el motín del tumulto, a pesar de atribuir a los dos géneros un carácter de movimiento popular (Tord-Lazo, 1981, 226).

<sup>5465</sup> Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989, 357; y Just Lleó, 1994, 344-345). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta, dueña del Ingenio Chaca, en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y con cuñado del Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de Alvarado y Toledo (Morales Guinazú, 1936, 104).

<sup>5466</sup> Criollo nacido en Quito. Este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; en Mendoza, 1939, en Costa Du Rels, 1944; en Francovich, 1948, 61-71; en Lynch, 1967, 227; en Tanzi, 1977, 183; y en Abecia Valdivieso, 1984, 155-176.

<sup>5467</sup> Cardozo, 1959; y López, 1976.

<sup>5468</sup> AGN, División Colonia, Bandos, Libro 2, fs.20 y 21.

<sup>5469</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2.

<sup>5470</sup> Garavaglia, 1984, 26.

<sup>5471</sup> conservación del orden, represión del contrabando, persecución de desertores, cuatreritos y salteadores, auxilio a los correos y chasquis, etc. Su autoridad fué el origen del poder absoluto de Gobernadores como el Fraile Aldao en Mendoza, Estanislao López en Santa Fé, Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero y Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires.

<sup>5472</sup> Beverina, 1935, 54; y Cabodi, 1950, 96. Llama la atención que Azcuy Ameghino (1988) descubra esta misma realidad sin alcanzar a citar ni a Beverina ni a Cabodi (Azcuy Ameghino, 1988, 12).

<sup>5473</sup> Rojas, 1963, 8.

<sup>5474</sup> Presidente de la Real Audiencia de Charcas (Burkholder y Chandler omiten mencionarlo). Marido de Rosa Escobar Castellanos, hija de Ramón Escobar Castellanos y de Francisca Plácida López de Velazco; con cuñado del hacendado Martín de Castañares; padre de José Francisco de Paula Martínez de Tineo, marido

de Magdalena de Goyechea (viuda de Gabriel de Güemes Montero); y suegro del Caballero de Carlos III Pedro José de Saravia y de Miguel Vicente de Solá e Inda (Cornejo, 1945, 30-50; debo esta referencia a la gentileza de Carlos Jáuregui). Según información enviada por el Gobernador de Buenos Aires Bucareli y Ursúa al Conde de Aranda, Martínez de Tineo se casó "...con la viuda de un mercader con crecida parentela" (Acevedo, 1969, 123). Sin embargo, para Carlos Jáuregui, Doña Rosa Escobar contrajo un sólo matrimonio (información particular). De esta contradicción surgiría que Bucarelli, para acentuar las tintas contra Tineo, malversaba la información que enviaba al Conde de Aranda. Martínez de Tineo informa al Virrey del Perú en 1752 la conducta de las Milicias de La Rioja y Catamarca (Juan Victorino Martínez de Tineo al Virrey del Perú, Salta, 28 de julio de 1752, Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, Carpeta 6, cuerpo 0, estante 3; cuya fotocopia existe en el fondo documental donado por Enrique Barba al Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>5475</sup> Larrouy, 1927, 157-220; Barrionuevo Imposti, 1968, 46-55; Bazán, 1979, 184-192; Acevedo, 1983-84, 50-55; Garavaglia, 1984, 26; y Gullón Abao, 1993, 109-124. Según Zinny (1920), la sublevación de las milicias catamarqueñas y riojanas estuvieron encabezadas por Antonio Salcedo, Sebastián Rizo, Bartolo Barros (presos en el Río del Valle), Lorenzo Horrillo, Gabriel Segura y Julio Casal; instigadas por el Cura de Catamarca Don Juan Adaro y los Presbíteros Francisco Salcedo y Miguel Villafañe; y patrocinadas por el Obispo Pedro Miguel Argandoña (Zinny, 1920, I, 203). Según Grenón, 1922, 257; Larrouy, 1927, 157-220; Serrano Redonnet, 1979, 215; y José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo Ysfrán, Camboño, Vallejos, Melo, Lafuente, y Arias Saravia, en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca [Buenos Aires]; en dicha sublevación participó en forma preponderante el mestizo bastardo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán, sujeto que, según Baltasar de Villafañe y Guzmán "...a sido cooperante por no decir primario...rigen de todas estas revoluciones pues el más mínimo escrito de los soldados a corrido no sólo por su dirección sino también por el trabajo de su puño" (Baltasar de Villafañe y Guzmán al Gobernador, La Rioja, 10 de Diciembre de 1753, AGN, División Colonia, Sala IX, 5-6-6).

<sup>5476</sup> Félix Cabrera Celis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentileo de la Rosa y Carranza (Calvo, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (Calvo, 1936, I, 240; y Lazcano, III, 195).

<sup>5477</sup> estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (Calvo, 1938, III, 229; Lazcano, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

<sup>5478</sup> Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (Allende Navarro, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (Calvo, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (Lazcano, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

<sup>5479</sup> contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (Calvo, 1938, III, 229 y 233; Lazcano, II, 203).

<sup>5480</sup> Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (Allende Navarro, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

<sup>5481</sup> Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Felipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (Calvo, II, 113).

---

<sup>5482</sup> Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de María Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del Barco (Lazcano Colodrero, II, 151).

<sup>5483</sup> Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

<sup>5484</sup> Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

<sup>5485</sup> Acevedo, 1972, 255.

<sup>5486</sup> Acevedo, 1972, 256.

<sup>5487</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.2 y 2v.; y AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4. El Capitán Bernardo Ríos declaró que aparte de disparárseles la caballada, "...la falta que ubo allí de tabaco también fué parte de todos los disgustos que tuvieron, que para suplirla mascaban yerbas del campo, o rayces de pajas, de lo que resultó llagárseles toda la boca y que se mantenían por alimento por falta de bastimentos con dichas rayces, y que aún siendo la carne flaca, daba para cada sesenta hombres un toro día de por medio" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4, fs.11v.).

<sup>5488</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19, fs.7v.; y Criminales, Leg.4, Exp.5 y 14. El Auditor Juan Manuel de Labardén afirma que "...Es innegable que lo que motivó la repugnancia de la gente fue lo que padecieron en el Río Pardo los primeros Correntinos que condujo Bernardo López. Y lo que estos padecieron no fue poco. La falta de alimentos continuados por todo el tiempo, que durase la expedición presindiendo de lo demás se puede contar por un martirio en circunstancias de estar viendo dar todo lo necesario a la tropa arreglada" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.1v.). En cuanto a la rebelión sufrida por el Comandante Barrenechea, Labardén observaba que el motivo de la misma no fue la violencia con que dicen que trató a algunos, "...sino en haber alistado a mas de quarenta de los que acababan de venir del Río Pardo. Que prudencia se puede encontrar en esto? todos ponderaban la miserias que habían padecido, todos encarecían el mal trato que les dió Catani. Si Barrenechea creía que hablaban verdad, como se persuadía que estos habían de volver a sufrir lo mismo? Si no los creía, como le parecía que habían de ir a entregarse al mismo a quien habían desacreditado falsamente? Casi se puede sospechar que esto fue buscar medios, para que sucediese lo que sucedió" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.4).

<sup>5489</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28, fs.21v. De results del motín, el Teniente Bartolomé Larios Galván, el Alférez Real Joseph Zerrano y el Fiel Ejecutor Juan Antonio de Aguirre fueron llevados presos al Igatimirí, donde "...los metieron en una canoa embarcando ocho hombres con ellos, y entre ellos el dicho Salvador Portugués que iba de popero, y que a la vuelta de una punta, que hace el río los amarraron de

---

las manos y ahogaron...Es voz corriente que el Director del tumulto ha sido Don Mauricio Villalba y que en varias ocasiones le ha dicho al declarante dicho Villalba, que donde murieran sus parientes metidos en el motín, ha de morir él. Y responde que por cosa particular le contó el dicho Salvador que auiendo ahogado a los dichos teniente y fiel ejecutor, echaron al agua al dicho Zerrano maniatado, y que fué buscando como media quadra donde salió con las manos desatadas invocando a la Virgen Santísima; y que allí lo bolvieron a amarrar, y echarlo y tornó a salir en la misma distancia desatado agarrando un Rosario (que tenía al cuello) de Jerusalem, y invocando a la Virgen del Rosario, y volvieron a amarrarlo, lo echaron tercera vez donde volvió a salir desatado, haciendo la misma diligencia en cuia vista, le quitaron el Rosario, y lo echaron quarta vez al agua apretándolo con un palo, y que entonces se ahogó" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28, fs.20).

<sup>5490</sup> Cipriano Hurtado de Lara, Bartolomé y Manuel Gallardo, José Cuello, Basilio Quevedo, Francisco Rivarola, Bernardo Urquijo, Luis Arana, Mateo Cejas, Inocencio Villafañe, Pedro Juan Balla, Domingo Olmedo, Ignacio Núñez, y Eugenio Heredia (Barrionuevo Imposti, 1968, 48). Ignacio Quevedo, hijo de José de Quevedo, cuyo parentesco con Basilio Quevedo lo ignoro, había heredado las estancias de San Martín y Chipchira. Policarpo Cuello, cuyo parentesco con José Cuello también lo ignoro, adquirió en 1735 una fracción de la antigua estancia del Rio de los Sauces al Pbro. Agustín Olmedo (Barrionuevo Imposti, 1949, 755, 761).

<sup>5491</sup> hijo del Gral. Bartolomé Olmedo. Vendió en 1764 la estancia de Santa Cruz de Nono al Sargento Mayor Francisco Garay, y fué propietario de la estancia de San Antonio de Chaquinchuna, heredándola su hijo Domingo Olmedo (Barrionuevo Imposti, 1949, 741 y 756).

<sup>5492</sup> Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, primo del padre del Gral. Martín Miguel de Güemes. Padre de Manuel Güemes Campero, un oficial de Facundo Quiroga, de quien el General José María Paz, relata en sus Memorias, como estando preso en su cuartel, luego de la batalla de Oncativo, comentó que la anécdota sobre el caballo moro que recriminó a Quiroga la participación en la batalla resistiéndose a ser montado fué real (Paz, Memorias, capítulo XVI). Cutolo, erróneamente asigna por padres de Manuel Güemes Campero a Manuel Güemes y Gómez y Manuela Güemes y Martierena del Barranco (Cutolo, III, 475).

<sup>5493</sup> Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Según Castellano Sáenz Cavia (1969) era cordobés e hijo de Antonio de Funes y de Juana Pavón (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 157); y según Verdaguer (1931) era nacido en Cuyo en 1731 (Verdaguer, 1931-32, 406).

<sup>5494</sup> Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15)

<sup>5495</sup> propietario de la estancia de Las Tapias (Barrionuevo Imposti, 1949, 758), quien la heredó de su mujer María Fernández, hija de Tomás Fernández y de Francisca Argüello. Era con cuñado del Capitán Francisco Antonio de Bringas y Chavarria (Castellano Sáenz Cavia, 1970, 356).

<sup>5496</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

<sup>5497</sup> Barrionuevo Imposti, 1949, 786; y 1968, 46-55.

<sup>5498</sup> Vendió en 1778 la estancia del Río de los Sauces, en Traslasierra, a Juan Luis Arias de Cabrera; era hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian; casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, hija de Tomás Bustos de Albornóz; y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140;

---

Barriónuevo Imposti, 1949, 742; y Castellano Sáenz Cavia, 1970, 18 y 24).

<sup>5499</sup> Ver Saguier, 1992.

<sup>5500</sup> Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Debía su cargo al Gobernador Gerónimo Matorras. Su primer esposa Ipólita Garay era hermana de: Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; del Alcalde Provincial Domingo Garay; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de Campo Diego de las Casas (AHC, Crimen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

<sup>5501</sup> Grenón, 1922, 256; y Carrizo, 1942, III, 413-415.

<sup>5502</sup> formado por Alonso de Ruiloba, Melchor García de Villegas, Inocencio Antonio Rodríguez de Valdivieso, Pablo Rodríguez de Lema y los Europeos Juan Pérez de Estrada [cuñado del Cura Juan Ildefonso Echalar] y Francisco González de Villa (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16).

<sup>5503</sup> Sobrino de Urbano Espejo (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp. 16). Entre 1755 y 1757 contrajo con mercaderes porteños diez operaciones de fiado por valor de \$13.168, importando yerba del Paraguay (AGN, Protocolos, Registro 2, año 1755, fs.573v., y 625v.; R.1, 1757, fs.280, 219v., y 214; R.2, 1757, fs.328v., 327v., 338v., y 340; y R.6, 1757, fs.283v.; y Sala IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7, fs.9v.). Su confirmación como Regidor de Tarija se obtuvo por Real Provisión de 3 de abril de 1764 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10; y Leg.14, Exp.8). El despacho de Coronel del batallón de Milicias se libró en 1775 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10). En 1782 recurre ante el Superior Gobierno por los agravios que le infirió el Cabildo de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.8). En 1786 presenta sus fojas de servicio para aspirar al título de Mariscal de Campo (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.10, Exp.11). Probablemente era pariente de Francisco Hurtado de Mendoza, cabildante de Córdoba, y hermano de José Hurtado de Mendoza, quien contrajo con mercaderes porteños, entre 1764 y 1785, media docena de operaciones de fiado por valor de \$17.331 (AGN, Protocolos, Registro 5, 1764, fs.114; R.6, 1764, fs.74v.; R.4, 1768, fs.213; R.2, 1768, fs.75 y 78v.; y R.5, 1785, fs.123).

<sup>5504</sup> Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera, mujer de Pedro Zansón; hermano entero de Juana y Bernardo de Arze; medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de Mendoza, mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas; y tío de José Patricio de Antequera (Morales, s/f, 98; Echazú Lezica, 1989, 91; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16, fs.23).

<sup>5505</sup> "...conocido en la Provincia por las pasadas experiencias de su cobardía, y pusilanimidad; y confirmado en la actualidad por el pánico terror, con que había huído de el enemigo, dejándole franca la entrada a la Provincia e inmediaciones de la Villa, arrojaron en esta tal espanto, y consternación, que los mas abandonaban sus casas para asegurarse en las Iglesias de los Conventos y muchos se disponían para dejar el Pueblo, y reconvertirse en los bosques y Montañas de la campaña...los Diarios que tanto relevaban sus proezas, y Militar pericia con las informaciones y representaciones que los acreditaban eran obra de la fantasía de su tío Don Urbano Espejo, consumado Maestro de falsedades, el cual no vino al fin de forjarlas, sino por medio de la violencia, y suposición consiguiendo de unos las firmas con amenazas y engaños" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16).

<sup>5506</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16.

<sup>5507</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.25, Exp.623, fs.117 y 156; y en Minutolo de Orsi, 1986.

<sup>5508</sup> Vecino de San Juan. Casado con Ana María Ladrón de Guevara (AGN, Tribunales, Leg.236, Exp.1). Padre de José Xavier Garramuño.

---

<sup>5509</sup> Espejo, 1954, II, 687; y Videla, 1962, I, 651. Debo esta referencia a mi colega Carlos Jáuregui Rueda.

<sup>5510</sup> Hijo de Juan Martínez de Soto y Rozas y de María Prudencia Correas y Villegas. Casó en 1787 con su prima hermana María Mercedes Corvalán y Correas, hija de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos; con cuñado de Bernardo Ortiz y de Francisco Segura San Pedro; padre del General Juan Martínez de Rozas; y suegro del General Juan Corvalán y de José de la Cruz Encinas (Morales Guinazú, 1939, 286).

<sup>5511</sup> Corregidor y Presidente de la Junta de Temporalidades de 1773 a 1777 (Fontana, 1962, 85).

<sup>5512</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta N.16, Documento No.4.

<sup>5513</sup> Estos indios se hallaban crudamente enfrentados a los indios Pehuenches por el control del comercio de sal con Chile (León Solís, 1989-90, 185). Acerca de los Capitanes de Amigos, ver Levaggi (1989-90).

<sup>5514</sup> Nació en Pasajes, provincia de Guipúzcoa, hijo de Bautista Amigorena y de María Teresa de Anzorena; primo hermano carnal materno del Licenciado Jacinto de Anzorena, quien a su vez era suegro del Comandante Francisco Esquivel y Aldao, y abuelo del Fraile Aldao; marido de María Prudencia de Escalante; y si bien no tuvo descendencia legítima reconoció numerosos hijos naturales (Sosa Morales, 1965, 7). En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiralde y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año diversos vecinos protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30). Fué autor de "Descripción de los caminos, pueblos y lugares que hay desde la ciudad de Buenos Aires a la de Mendoza, en el mismo reino" (Cuadernos de Historia Regional, Luján: Universidad Nacional de Luján, 11, abril de 1988).

<sup>5515</sup> Hijo de José Xavier de Santander y Coria y de Andrea Corvalán de Castilla y Chirinos de Posadas, sobrino político del Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio de Molina y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, y de Matías de Godoy Lima y Melo; y cuñado de Ignacio Domingo Corvalán Escalante (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176 y 184).

<sup>5516</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.46v.

<sup>5517</sup> Hijo de José de Sotomayor y Dávila, natural de La Rioja, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar; y suegro de Félix Correas, de Domingo Corvalán, de José Clemente Benegas, de Isidoro Sáinz de la Maza, y de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

<sup>5518</sup> Comadrán Ruiz, 1962.

<sup>5519</sup> Doctorado en Chile (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del Capitán Francisco Antonio Martínez de Salas y de Ana Rosa de los Ríos, viuda de Enrique Henríquez Nuño del Aguila, vecinos de Corrientes; casado con María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada; y suegro de José Antonio de Rojas, y de Ramón Martínez de Rozas y Correas de Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y FB, IV, 12 y 290)

<sup>5520</sup> AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.42.

<sup>5521</sup> hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla, padres de Maria Josefa Videla, mujer de Raymundo Pelliza Morales, y del R.P. Ramón Videla S.J., jesuita expulso; y en segundas nupcias con Catalina Chacón (Calvo, IV, 334; Verdaguer, 1931-32, 440 y 485; Mansilla, 1941, 144; y Fontana, 1962, 80). Francisco Videla y Aguiar era asimismo primo hermano de Clara Isabel Escalante Videla, mujer de Francisco Corbalán de Castilla, y madre de Luis,

---

Antonio, Miguel Fermín y Juan Corvalán y Escalante, toodos ellos jesuitas expulsos (Verdaguer, 1932, 440). Probablemente Don Francisco fué de filiación sarracena, partidario de los Jesuitas, por el hecho de tener un hijo y cuatro sobrinos Expulsos.

<sup>5522</sup> marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

<sup>5523</sup> Masini Calderón, 1979, 192 (Debo la referencia de este autor a la generosidad de mi colega Pablo Lacoste).

<sup>5524</sup> Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

<sup>5525</sup> Yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144); y probable primo hermano del Capitán Diego de Alvear y Ponce de León.

<sup>5526</sup> Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.10).

<sup>5527</sup> representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107).

<sup>5528</sup> Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

<sup>5529</sup> Procurador General en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). El Comisionado del Virrey de Lima José Álvarez Nava le siguió una causa criminal por malversación de los fondos pertenecientes a la Renta de Correos de Oruro. Aurrecochea le había adelantado al Alférez Real Diego Antonio Flores (marido de María Josefa Galleguillos), en 1777, \$72.000, procedentes de las rentas del Correo, para el trabajo de sus minas e ingenios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.3, Exp.9a; y Hacienda, Leg.10, Exp.192).

<sup>5530</sup> Procurador General en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Sobre su defensa, excarcelación y conducción a España (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.4, Exp.13; e Interior, Leg.39, Exp.14). Sobre su embargo (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.29, Exp.750). Sobre su testamentaria (AGN, División Colonia, Juzgado de Bienes de Difuntos, Leg.40, Exp.12).

<sup>5531</sup> Alcalde de segundo voto en 1781 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Urquieta, mujer del Regidor Decano Manuel Serrano, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8); y de Manuela Gallardo y Urquieta, mujer de Joaquín Mariano de León y de José Antonio Ramallo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.2).

<sup>5532</sup> Alcalde de segundo voto en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Se encuentra en una lista de declarantes complicados en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.1). En 1784 se le embargan sus bienes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.23). En 1807 sus herederos presentan quejas contra el Comisionado de Visita de Oruro (AGN, División Colonia, Interior, Leg.62, Exp.8).

<sup>5533</sup> Alcalde de segundo voto en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Galleguillos, mujer de Diego Antonio Flores, uno de los reos de Oruro, y heredera de José de Galleguillos, dueño de los Ingenios de Sora Sora (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.6; y Hacienda, Leg.61, Exp.1559).

<sup>5534</sup> Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

---

<sup>5535</sup> Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>5536</sup> Cornblit, 1972, 137.

<sup>5537</sup> Cajías de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990-91.

<sup>5538</sup> Lewin, 1957, 564-565; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1.

<sup>5539</sup> Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115. Los 100 o 300 hombres que Tucumán había destinado a Chuquisaca, bajo el mando del Comandante Juan Silvestre de Heza y Helgueros, para reprimir la rebelión indígena de Túpac Katari, finalmente se sublevaron en Sica Sica contra su propio Comandante Helgueros (Valle de Siles, 1990, 466; Actas Capitulares de Tucumán, marzo de 1781; AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp. 21, fs.94; y Testimonio de Mariano Ramón de Vargas y Rodríguez, AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.28, Exp.21). Era hijastro de Juan Francisco Dehesa y Helguero, natural de la Villa de Laredo, en las Montañas de Burgos, el segundo marido de su madre Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid; marido de María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Javier de Villavieja y de Francisca Gonsález; hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 145, 101, y 35).

<sup>5540</sup> Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en 1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, ítem 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José Domínguez, padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez, bautizado en Tucumán en junio de 1801, y hermano del Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214). Asimismo, fueron suegros de Manuel Fernández Carranza, y padres de Agueda Texerina y Domínguez, mujer de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744. En otras palabras Manuel Posse y Manuel Carranza eran concuñados (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379). Fermín Vicente Texerina es el mismo que se había solidarizado con el Administrador del Estanco del Tabaco Gaspar de Salcedo.

<sup>5541</sup> Regidor, Capitán del Regimiento de Caballería del Tucumán y agregado al Cuerpo de Arribeños. Nació en Cabrejas del Pinar en 1748. Casó en primeras nupcias con María Rosa Pariente y Argañaráz, hija de Francisco Pariente y de Margarita Argañaráz de Murguía y Abreu de Figueroa; y en segundas nupcias con Isabel García, hija de Manuel García y Tezetia, y de Gabriela Aráoz y Paz de Figueroa. Doña Isabel había previamente enviudado dos veces, la primera de Don Luis Melgarejo, natural del Alto Perú, y la segunda de Juan Barthelemy y Verdugo (Padilla, 1987, 83 y 87). Sólo tuvo siete hijos en su primer matrimonio, de los cuales Manuela Ricarda, contrajo primeras nupcias con José Lorenzo García Valdés, y segundas nupcias con José Santiago Maciel y Mendieta; y Miguel Manuel Padilla, que casó cuatro veces, la primera con María Dolores Monzón y Murga, hija de Joaquín Monzón y de Catalina de Murga; la segunda con Tomasa de la Puente y Norry, viuda de Pedro José Márquez, hija de Manuel de la Puente Carrera, natural de Galicia, y de María Elena Norry; la tercera con la hermana de esta última Manuela de la Puente; y la cuarta con su sobrina política Agueda Domínguez, hija de Bartolomé Domínguez y de Catalina de la Puente (Padilla, 1987, 99-100). En 1808 Manuel Pérez Padilla hizo renuncia de su oficio de Regidor en su hijo Miguel (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.52, Exp.1508, fs.49). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, los Aráoz extrajeron del Colegio Jesuítico del Tucumán, para la casa de Isabel García "...todo lo que respecta a vidriería que había encajonada, y aún los vidrios que ya estaban colocados en las ventanas" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

<sup>5542</sup> Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

<sup>5543</sup> Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de

---

Isidro de Murga y de Isabel Núñez de Avila, padres de Visitación Monzón, la cual casara con José Ignacio Gancedo (Avila, 1920, 97; y Corominas, 1987, ítem 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado García, y si salió libre al primer día del arresto, sin habérsele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

<sup>5544</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

<sup>5545</sup> Primo de Juan López Cobo. Casó con Francisca Bazán, hija de Juan Antonio Bazán y de Petrona Estévez, padres de Nicolás Valerio Laguna; de Benito Laguna; de Nicolasa Laguna, mujer de Domingo Villafañe, sin sucesión; del Pbro. Dr. Miguel Martín Laguna, cura de Trancas; de Gertrudis Laguna, mujer de Pedro Antonio Zavalía; y del Dr. Juan Venancio Laguna, marido de María Agueda Aráoz y Córdoba, hija de Juan Antonio Aráoz y de Josefa Córdoba y Gutiérrez (Avila, 1920, 62, 91 y 94). Mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.3-1760-fs.34), y con Juan de Lezica y Torrezuri (AGN, Protocolos, R.4-1761-fs.281v.; R.6-1769-fs.98).

<sup>5546</sup> Dichas elecciones fueron anuladas por cuanto el Fiel Ejecutor Juan Antonio Aráoz, conjuntamente con el Regidor Francisco de Texerina y Barrera, las habían impugnado "...por ser violatoria a una Real Cédula que trata sobre la oligarquía [primera vez que se utiliza esta caracterización en el Río de la Plata]" (Actas Capitulares de Tucumán, en *Índices Documentales* (Tucumán: Archivo Histórico, 1974). Esta decisión del Gobernador de Salta fué repudiada por la mayoría de los vecinos de Tucumán, pues "...es como excepción de la regla general que prohíbe elegir los oficios de República de otro modo que no sea por votación de los Vocales del Cabildo" (AGN, Sala IX, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.28).

<sup>5547</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>5548</sup> Pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán. Fué designado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

<sup>5549</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>5550</sup> Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortiz de Ocampo.

<sup>5551</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

<sup>5552</sup> Idem.

<sup>5553</sup> criollo, hijo de Juan de Cañas, Leonés, y de Mariana de Oribio, marido de Juana Rosa López de Lagos

---

(FB, II, 59).

<sup>5554</sup> AGN, División Colonia, Reales Ordenes, Libro 51, foja 174. El extenso como interesantísimo Informe del Sargento Mayor Francisco Julián de Cañas sobre Juan José Sarden y su supuesta cobardía se halla en AGN, División Colonia, Sub-Inspección, 1762-84 (Sala IX, 28-6-2); y viene siendo estudiado por mi discípulo Daniel Vásquez.

<sup>5555</sup> Fué uno de los autores de los tumultos de 1781 contra el Cura Fernando Quiroga y Taboada (Pérez Colman, 1936, I, 267).

<sup>5556</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.258, Exp. 1 y 5. Rocamora era natural de Nicaragua. Para más datos ver Pérez Colman, 1936, I, capítulos XIV y XV; y Segura, s/f.

<sup>5557</sup> Hija de Juan Pranz, nacido en Inglaterra, y de Martina Siniestra; cuñada de José Rodríguez; y mujer de Carlos Wright (FB, V, 241 y 352).

<sup>5558</sup> Presbítero, hijo de Alonso García de Zúñiga y de Juana Lisola y Escobar, hermano del Comandante Estéban Justo García de Zúñiga, y cuñado del Coronel Juan Ignacio de Elía.

<sup>5559</sup> marido de Micaela Chirif, hija de Eduardo Chirif y de María del Pilar Niquilson; y suegro de Domingo Estévez Vázquez (FB, II, 279).

<sup>5560</sup> marido de Francisca Rodríguez Durán y suegro de Antonio de Suso (FB, II, 124).

<sup>5561</sup> marido de Ana Piñero y compadre de Domingo de Armas (FB, V, 121).

<sup>5562</sup> Para más detalles ver Segura, s/f, 43-49. Sobre milicias y faccionalismo en Santa Fé, 1660-1730, ver Areces, 2002.

<sup>5563</sup> estudió en la Universidad de Córdoba, habiendo sido alumno de Victorino Rodríguez entre 1796 y 1797 (Cutolo, III, 671).

<sup>5564</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.40, Exp.17, fs.180v.

<sup>5565</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.26.

<sup>5566</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.26.

<sup>5567</sup> Hijo de Francisco Pacheco y Cevallos y de Joaquina Camacho Narvona, marido de Dionisia Obes; y consuegro de Benito Chain.

<sup>5568</sup> peninsular, marido de Dolores Hurtado Zuloaga, hija del Dr. José Antonio Hurtado y Sandoval y de Ana Josefa Felipa Zuloaga (FB, IV, 44; y VM, 1988, ítem 4450). Participó en la revolución, enrolándose en el ejército de San Martín. Una vez en Lima, desertó del ejército patriota y se volcó al bando realista (Yaben, 1938, I, 291-95). Su viuda tuvo varios hijos extra-matrimoniales, contrayendo segundas nupcias con Cayetano Artayeta.

<sup>5569</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17; y Marilúz Urquijo, 1987, Capítulo XI.

<sup>5570</sup> Según un testimonio de época, dichos indios "...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y Tacuarí y cuñado de José del Casal y Sanabria] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos extremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas" (AGN, Interior, Leg.40, Exp.3, fs.101).

<sup>5571</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15.

<sup>5572</sup> Regidor Decano Don Fermín de Arredondo Lovatón, Alférez Real Bernardo de Argaña, Alguacil Mayor José Estéban de Arza, Procurador Síndico Juan Francisco Decoud, y Regidores José Doria, José Teodoro

---

Fernández, Sebastián Antonio Martínez Sáenz, Juan Ignacio Villasanti, Luis Bargas Machuca, y Narciso de Echagüe y Andía.

<sup>5573</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>5574</sup> Figuraban en 1795 como Coroneles de Ejército el Marqués de Casa Hermosa, Andrés Ordóñez, el Conde de Liniers, Domingo Chauri, Pascual Ibáñez de Echavarrí, Francisco Bruno de Zavala, José Ignacio Quintana y Bernardo Lecocq; como Tenientes Coroneles de Ejército Miguel Zamora, Francisco Cavallero, Joaquín Alós, Sebastián Pizarro, Joaquín Antonio Mosquera, Francisco Orduña, Juan de Salas, José Ignacio de Merlos, Manuel Gutiérrez, José Calaceite, Gaspar de la Plaza, Francisco Rodrigo, Tomás de Rocamora, Pedro de Arze, Félix de Iriarte, Vicente Ximénez, Manuel Soler y Francisco García Carrasco; y como Sargentos Mayores de Ejército Miguel Fermín de Riglos y Nicolás de la Quintana (AGN, División Colonia, Sala IX, 1-8-2)

<sup>5575</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, 1821-22, fs.126. Debo este valioso dato a la generosidad del colega Juan Méndez Avellaneda.

<sup>5576</sup> Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, hijo de José de Saravia y Porcel de Peralta y de su segunda esposa María Josefa Arias Velásquez; medio hermano del Alcalde José Domingo Saravia y Aguirre; medio tío del célebre jurista y político Mateo de Saravia y Jáuregui; y marido de Bárbara Martínez de Tineo, hija del Teniente Gobernador de Salta y Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo y de Rosa Escobar Castellanos (AC, 1973, 40; y AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.14, Exp.23).

<sup>5577</sup> Apellido originario del solar de Valdeosera, La Rioja (García Carraffa, LXXXIV, 112). Casado con Catalina Fernández de Loria, hija de Manuel Fernández de Loria, vecino de Salta, y de Sabina Arias Velásquez (Jáuregui, 1976, 114). Cornejo (1937) señala un matrimonio previo de Tejada con Juana Antonia Salvo, con la cual tuvo a Juliana Tejada, mujer del Coronel Francisco Elías Martínez de Hoz, hijo de Mateo Martínez de Hoz y de Agueda Alonso Martínez (AC, 1937, 637).

<sup>5578</sup> Acevedo, 1965, 466.

<sup>5579</sup> Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17 de mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728, y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201, Exp.2 y 3).

<sup>5580</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350. Aparentemente, en aquellos tiempos se solicitaba ser miliciano sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar "...y no para servir en la Guerra del Chaco, ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años pasados en las Provincias Peruanas". Para confirmar este aspecto de la denuncia, Archondo afirmaba que "...luego que se tuvo la noticia infausta de la toma de Buenos Aires por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se ocultaron los citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital" (Ibidem).

<sup>5581</sup> Ibidem.

<sup>5582</sup> Ibidem.

<sup>5583</sup> Ibidem.

<sup>5584</sup> Ver Grosso Lorenzo, 2004, 48.

<sup>5585</sup> Gaspar de Santa Coloma había pedido en 1789 su libertad (AGN, División Colonia, Solicitud de Presos,

---

Libro 3, hoja 233).

<sup>5586</sup> AGN, División Colonia, Despachos y Nombramientos Civiles y Eclesiásticos, 1796, Sala IX. En Cuba eran conocidos bajo el nombre de rancheadores (Franco, 1981, 47; y Pérez de la Riva, 1981, 62); y en Bahía, Brasil por Capitanes de Monte (Schwartz, 1981, 168, nota 23, 170, nota 26, y 172).

<sup>5587</sup> con referencia al Comandante negro liberto al servicio de los blancos de Jamaica (Patterson, 1981, 203, nota 10, y 206).

<sup>5588</sup> Pascual Ibáñez de Echabarry a Antonio Olaguer Feliú, Buenos Aires, 22-II-1798 (AGN, División Colonia, Comandancia General de Armas, Leg.2, Sala IX, 1-8-3).

<sup>5589</sup> Archer, 1993, 249.

<sup>5590</sup> Socolow, 1987, 157.

<sup>5591</sup> Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

<sup>5592</sup> Céspedes del Castillo, 1985, 289.

<sup>5593</sup> Socolow, 1987, 193.

<sup>5594</sup> Ver el capítulo II-A-4 de este tomo.

<sup>5595</sup> como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de México; y para Martínez Ortega (1989,1992) y González Muñoz (1992), quienes analizan la elite Yucateca.

<sup>5596</sup> Martínez Ortega, 1989, 216. Sherman (1977, 1980) y Williams (1988) reconocen a partir de la sociobiología la importancia que el rol del nepotismo tiene en el género animal (Williams, 1988, 384 y 397). Sherman (1977) demuestra en un gran número de especies sociales que los parientes más próximos reciben una mayor ayuda (Reiss, 1984, 123). Las relaciones de parentesco entre los seres humanos surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elías (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elías, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Uicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para

---

contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entonces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

<sup>5597</sup> no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

<sup>5598</sup> González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112.

<sup>5599</sup> Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968); y para la enumeración de los privilegios que otorgaba la vecindad ver Lorenzo Schiaffino (1984).

<sup>5600</sup> Peña, 1983.

<sup>5601</sup> Parry, 1953.

<sup>5602</sup> Sobre la sociedad cortesana, ver Elias, 1982. Para la constitución de las elites cortesanas en la emergencia del estado imperial brasilero, ver Malerba, 2001.

<sup>5603</sup> Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

<sup>5604</sup> Acevedo, 1965, 4. Sobre la corte virreinal en la América hispánica durante la época colonial, ver Büschges, 2001.

<sup>5605</sup> Graduado de Doctor en Alcalá de Henares. Según Burkholder y Chandler indudablemente no había comprado su puesto (Burkholder y Chandler, 1984, 71).

<sup>5606</sup> Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de

---

María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>5607</sup> Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano Colodrero [en adelante LC], 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

<sup>5608</sup> Acevedo, 1969, 123. Casado con Rosa Escobar Castellanos, hija de Ramón de Escobar Castellanos y de Francisca López de Velasco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.14, Exp.23).

<sup>5609</sup> Comadrán Ruiz, 1962, 61.

<sup>5610</sup> Acevedo, 1992, 184.

<sup>5611</sup> Natural del Lugar de Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés Matorras y de Ana Cires; marido de Manuela Larrazábal, hija de Antonio Larrazábal y de Agustina Avellaneda, y viuda de José Fernández; y conuñado de Martín José de Echauri, Juan de Otárola, José Antonio de Iturriaga, Martín de Arráiz y Pablo de Aoiz (Acevedo, 1969, 185; Jáuregui Rueda [en adelante JR], 1987, ítem 3231; y Fernández de Burzaco [en adelante FB], IV, 113).

<sup>5612</sup> sobrino carnal del Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 Dr. Tadeo Fernández Dávila (Cutolo, II, 484; y VII, 270; y Cornejo, 1947, 151-158).

<sup>5613</sup> Arribas, 1970.

<sup>5614</sup> nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Córdoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y conuñado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta, del Coronel Ventura José Marquiegui Marquiegui y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65). En 1807 el Cabildo salteño, se quejaba de la traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado.

<sup>5615</sup> Acevedo, 1965, 144.

<sup>5616</sup> AC, 1972, 65.

<sup>5617</sup> antiguo Situadista, marido de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaraz; padre de Julián Gregorio de Zegada, y del R.P. José Miguel de Zegada; y abuelo del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

---

<sup>5618</sup> Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan y Soria; hermano de Juan Martín de Pueyrredón; cuñado de Ambrosio Sáenz Valiente; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

<sup>5619</sup> En efecto, Balmaceda se había casado con Francisca Benítez, sobrina del R.P. Pablo Benítez, S.J., Padre Superior de las Misiones, y del R.P. Blas de Silva, quien fuera ejecutado por los indios Payaguás en las vísperas de la rebelión Comunera (1721-35); y hermana del Regidor Andrés Benítez (Saeger, 1972, 219; y Susnik, 1993, 51-56).

<sup>5620</sup> Garavaglia, 1987, 256, nota 62.

<sup>5621</sup> Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, extendió las fronteras del Paraguay e introdujo la figura de los Administradores civiles de los pueblos de indios (Garavaglia, 1983, 143, 336-338). Marido de María Josefa de Igarzábal, hija del Capitán Antonio de Igarzábal y Goitia y de Bernarda de la Rivilla y Crespo Flores; y suegro de Fermín Javier de Aoíz y Larrazábal (JR, 1989, ítem 4510; y FB, IV, 50 y 360).

<sup>5622</sup> FB, IV, 360; y JR, 1989, ítem 4510.

<sup>5623</sup> Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, hijo del General Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; marido de Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos (FB, IV, 114; y V, 253; y JR, 1987, ítem 1415; y 1989, ítem 4210).

<sup>5624</sup> Coronel de Ejército, suegro del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti (FB, II, 265).

<sup>5625</sup> JR, 1987, ítem 3231.

<sup>5626</sup> nacido en Coria, Extremadura; hijo de Jacinto Marín y de Mauricia Antonia; marido de María Rosa Estefanía de la Quintana y Riglos (FB, IV, 243).

<sup>5627</sup> Caballero de Alcántara y Comandante. Suegro del Teniente Coronel Agustín Casimiro de Aguirre y de José Manuel Prudent (FB, IV, 101).

<sup>5628</sup> Viola, 1985, 85-89.

<sup>5629</sup> Cabodi, 1950, 135, nota 260.

<sup>5630</sup> yerno del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoín y Lavayén (Fernández de Burzaco, I, 140). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

<sup>5631</sup> marido de Juana Albizuri y Echauri, hija del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti.

<sup>5632</sup> Tesorero de Real Hacienda, Caballero de la Orden de Santiago y Coronel de Ejército (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y JR, 1989, ítem 5929).

<sup>5633</sup> nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; con cuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165).

---

<sup>5634</sup> Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165.

<sup>5635</sup> Céspedes del Castillo, 1985, 289.

<sup>5636</sup> Casó a su sobrina Petrona Salcedo con Antonio José Escalada, hijo de Manuel de Escalada (Pillado, 1910, 218). Petrona era hija de José de Salcedo, natural de la Villa de Moquegua, y de Juana de Silva Rodríguez, natural de Santa Fé; y sobrina nieta del Teniente General y Gobernador Miguel de Salcedo (AGN, Protocolos, Registro 3, 1790, fs.350v.).

<sup>5637</sup> tío de Nicolás del Campo, marido de Juana Maciel, hija del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 73).

<sup>5638</sup> marido de Rafaela Francisca de Vera y Pintado, hija del Teniente General Francisco Antonio de Vera Mujica y de Juana Ventura de López Pintado; y con cuñado de Juan José de Lezica y Alquiza (FB, IV, 143).

<sup>5639</sup> natural de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Tomás Olaguer Feliú y de Josefa de Heredia y Domec; marido de Ana de Azcuénaga, hija de Vicente de Azcuénaga y de Rosa Benedicta de Basavilbaso; cuñado del Comandante Miguel de Azcuénaga, y con cuñado de Gaspar de Santa Coloma y de Agustín Antonio de Erézcana (JR, 1989, ítems 5899 y 6161; y FB, II, 201 y 284).

<sup>5640</sup> natural de Sevilla, hijo de Raimundo de Sobremonte y Castillo y de María Angel de Núñez y Carrasco; marido de Juana María de Larrazábal y Quintana, hija del Coronel y Caballero de la Real Orden de Santiago Marcos de Larrazábal y de María Josefa de la Quintana y Riglos (JR, 1989, ítem 4741).

<sup>5641</sup> hijo del Conde Luis Henri de Liniers y de la Condesa Henriqueta de Bremond; marido en primeras nupcias de Juana Minvielle; y en segundas nupcias de María Martina de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa Altolaquirre, con cuñado del Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros (JR, 1989, ítem 4940; y FB, IV, 148).

<sup>5642</sup> Socolow, 1987, 206.

<sup>5643</sup> Real Provisión librada el 4-II-1758 por la Real Audiencia de La Plata.

<sup>5644</sup> nieto del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano.

<sup>5645</sup> Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, dirigido por el Prof. Carlos Mayo, de la Universidad Nacional de La Plata.

<sup>5646</sup> *Ibidem*.

<sup>5647</sup> El R.P. Bernabé Echenique y Urtubey era discípulo e íntimo amigo del R.P. José Manuel Peramás S.J., autor de las *Laudatione* Quinque.

<sup>5648</sup> Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante, y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por el Investigador Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Prudencio Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios (AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

---

<sup>5649</sup> Ex-Teniente de Rey de Córdoba en 1744 (Acevedo, 1972, 254). Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (LC, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

<sup>5650</sup> Probablemente fuera Domingo Santibáñez, vecino de Salta, Síndico del Convento de San Francisco. En 1791 solicitó la devolución de lo que abonó con exceso por derechos de alcabala (AGN, Tribunales, Leg.S-10, Exp.19).

<sup>5651</sup> muy probablemente se tratara de Francisco de Armesto y Allende, hijo de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27); marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85); y padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Cornejo (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Francisco Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su cuñado Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

<sup>5652</sup> AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

<sup>5653</sup> Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

<sup>5654</sup> "...caminando en coche anduvo la Provincia que abraza sobre 400 leguas en 23 días, en cuyo viaje, como dijeron varios, ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20 años; pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en cargar el coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras, trabajo, herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

<sup>5655</sup> La duda cabe si se trataba de Clemente Guerrero o de Martín de Arrascaeta. Según Acevedo (1969) este escribano fué Guerrero (Acevedo, 1969, 18). Guerrero era natural de Cádiz, casado con Josefa de las Casas y Funes, hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, sobre el Río III, por compra al Monasterio de Santa Teresa, y de Micaela de Funes (LC, II, 133). Su mujer se opuso al casamiento de su hijo José con su prima Petrona Garay (Pueyrredón, 1958, 250). Arrascaeta era natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

<sup>5656</sup> AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

<sup>5657</sup> AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

<sup>5658</sup> Hijo de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí. Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las

---

Casas y Jaime y de Teresa Ponce de León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y concuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

<sup>5659</sup> Hijo natural de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27). Marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85); y padre de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Pacheco (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su hijo Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

<sup>5660</sup> Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y de María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza y del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Phelipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán, mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27; y Calvo, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de Medina, y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro y Liria (Allende Navarro, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>5661</sup> En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión (AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

<sup>5662</sup> Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgoibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaache solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

<sup>5663</sup> Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (LC, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

<sup>5664</sup> Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Su primer esposa Ipólita

---

Garay era hermana de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde Provincial Domingo Garay, de Fernando Garay, de Teresa Garay, mujer de José de Ariza, y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

<sup>5665</sup> Estuvo preso con el Alcalde Provincial José Martínez, y con Don Manuel Isidoro Gutiérrez con motivo de la Expulsión de los Jesuitas (Learte, 1926, 216).

<sup>5666</sup> Nacido en Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés de Matorras y de Ana de Cires. Gobernador de Córdoba del Tucumán entre 1769 y 1770. Fueron sus fiadores por la suma de \$50.000 los comerciantes residentes en Córdoba Estéban Montenegro, Francisco Antonio Díaz, Bonifacio Aramburu y Bernabé Gregorio de las Heras (Acevedo, 1969, 137). Primo hermano del comerciante Juan Eusebio de Cires y Fernández de Cossio, y compadre de Eugenio Lerdo de Tejada (Acevedo, 1969, 210). Marido de Manuela de Larrazábal, hija del comerciante porteño Antonio de Larrazábal; y cuñado del Caballero de Santiago y Gobernador del Paraguay Coronel Marcos Larrazábal, del Coronel Martín José de Echauri, del Coronel Juan Gregorio de Otálora, y del comerciante José Antonio de Iturriaga (FB, 1986-90, I, 137, 140 y 162; II, 265; III, 163; IV, 74, 113 y 298; y V, 94).

<sup>5667</sup> Acevedo, 1969, 151.

<sup>5668</sup> Español, casado con María del Carmen Albornóz y Carranza, hija de José de Albornóz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiola; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

<sup>5669</sup> Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

<sup>5670</sup> Nacido en Lima en 1708 y designado primero Corregidor de Andahuaylas y luego en 1756 Gobernador de Córdoba del Tucumán. Sustituyó en este último cargo a Juan de Pestaña Chumacero, que debió pasar a cubrir la Presidencia de la Real Audiencia de Charcas (Acevedo, 1982, 63).

<sup>5671</sup> Levillier, 1915, II, 154.

<sup>5672</sup> Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo (Hevia Bolaños, 1853, 14).

<sup>5673</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.98, Exp. 13, n.34. Lazcano (1936) da como padres legítimos de María Isabel a Francisco Gigena y Juana Soria. Bedoya fue padre del Coronel Francisco Solano Bedoya y de José María y Elías Estanislao Bedoya (Lazcano, 1936, I, 60).

<sup>5674</sup> Figura en la Matrícula de Abogados graduados en la Universidad de Charcas (Cutolo, 1963, 47 y 101).

<sup>5675</sup> Levene, 1960, 122.

<sup>5676</sup> Hijo del Maestre de Campo Bernardino de Albarracín Díez Zambrano, nacido en Salta, y de María Balmaceda de los Ríos, nacida en San Juan. Don Remigio era casado con Josefa Juana de Irrázabal Sánchez, hija de José de la Cruz de Irrázabal Herrera, nacida en Santiago de Chile, y de María Sánchez de Loria Jofré de la Guardia, con quien tuvo entre otros hijos a Doña Paula Albarracín, casada en 1801 con José Clemente Sarmiento y Funes, padres del autor de Facundo (Calvo, V, 28).

<sup>5677</sup> Vecino de San Juan. Casado con Ana María Ladrón de Guevara (AGN, Tribunales, Leg.236, Exp.1).

---

Asesinado en 1764 por una partida de indios (Espejo, 1954, II, 687). Padre de José Xavier Garramuño.

<sup>5678</sup> Archivo Nacional de Santiago de Chile, Informe R.A., vol. 491, Pieza 6, citado por Acevedo, 1963, 178.

<sup>5679</sup> Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol. 1973, pieza 2, citado por Acevedo, 1963, ítem 808. Ver asimismo, Acevedo, 1966, 225-244. Cuando fué promovido al Corregimiento de Cochabamba, para su viaje a dicho reino, el Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz le informa en 1784 al Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto "...fué necesario lo costease, o supliese el dinero un criado que trajo de España, que más feliz en el laboreo de una mina separado de su amo había logrado una más que mediana fortuna" (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.25, fs.13).

<sup>5680</sup> Comadrán Ruiz, 1962, 53-54.

<sup>5681</sup> Archivo Nacional de Santiago de Chile, J.A. vol 148, Pieza 9; C.G. vol.711, n.8.317; C.G. volúmenes 997 y 998, n.17.774; y R.A. vol.557, Pieza 1, citados por Acevedo, 1963, ítems 878, 903, 905, 991 y 1008.

<sup>5682</sup> Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.557, Pieza 1, citado por Acevedo, 1963, ítem 1031.

<sup>5683</sup> Doctorado en Chile (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del Capitán Francisco Antonio Martínez de Salas y de Ana Rosa de los Ríos, viuda de Enrique Henríquez Nuño del Aguila, vecinos de Corrientes; casado con María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada; padre de Judas Tadeo de Salas, integrante de la facción Sarracena que defendiera a los Jesuitas y al Virrey Cevallos; y suegro de José Antonio de Rojas, y de Ramón Martínez de Rozas y Correas de Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y Fernández de Burzaco, IV, 12 y 290)

<sup>5684</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

<sup>5685</sup> Phelan, 1972, 604.

<sup>5686</sup> *Ibidem*.

<sup>5687</sup> *Ibidem*.

<sup>5688</sup> Casado con Nicolasa Corvalán de Castilla, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada, conuñado del Dr.José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de José Xavier Santander y Coria, de Matías de Godoy Lima y Melo, y de Manuel José de Godoy y Rojas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

<sup>5689</sup> Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

<sup>5690</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

<sup>5691</sup> *Ibidem*.

<sup>5692</sup> En 1779 pide se le releve de la fianza que otorgó por Jacinto Camargo y Loayza al tiempo que se le recibió de Corregidor en Mendoza (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.16, Exp.356). En 1768 acusa a varios vecinos poderosos de Mendoza por no querer pagar los derechos de alcabala (Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.2358, Pieza 15, citado por Acevedo, 1963, ítem 880).

<sup>5693</sup> Marido de Bernarda Correa de Saa y Pardo Parraguéz, padre de Gavino Jurado, casado con María Mercedes de Puebla Molina; y suegro de Francisco Vargas, Pedro Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta (Calvo, IV, 29).

---

<sup>5694</sup> Corregidor interino y Alcalde de primer voto en 1781 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documento 7). Nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido de Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chénaut (Morales Guinázú, 1939, 226).

<sup>5695</sup> Alcalde de segundo voto en 1779 y 1794; y Procurador General en 1780 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documentos 5 y 6; y Carpeta 17, Documento N.9).

<sup>5696</sup> Alcalde de primer voto en 1782 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documento 8). Marido de Lorenza Sanjurjo y suegro de José de Silva (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.132, Exp.3, fs.70; y Tribunales, Leg.55, Exp.4).

<sup>5697</sup> hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de María Pardo Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguier, 1931-1932, 440 y 485).

<sup>5698</sup> Nació en Pasajes, provincia de Guipúzcoa, hijo de Bautista Amigorena y de María Teresa de Anzorena; primo hermano del Licenciado Jacinto de Anzorena; marido de María Prudencia de Escalante; y si bien no tuvo descendencia legítima reconoció numerosos hijos naturales (Sosa Morales, 1965, 7). En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiralde y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

<sup>5699</sup> AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

<sup>5700</sup> noveno hijo del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de Tomasa Franco Torres; y padre del Comandante José Antonio Yegros y de María Josefa de Yegros, mujer de Pedro Pereira (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252; Velázquez, 1981, 213-285; y Spangenberg, 1992, 428).

<sup>5701</sup> Velázquez, 1981, 238.

<sup>5702</sup> En 1765 Cabañas promovió una cuestión judicial en el Juicio de Residencia contra Fulgencio Yegros (Velázquez, 1981, 240). Esta cuestión obedecía a las acusaciones del Gobernador Interino Fulgencio Yegros de que Cabañas se hallaba implicado en la sublevación de la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, ocurrida ese año (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28).

<sup>5703</sup> Rivarola Paoli, 1988, 148.

<sup>5704</sup> AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7).

<sup>5705</sup> Idem.

<sup>5706</sup> Idem.

<sup>5707</sup> Rivarola Paoli, 1988b, 33.

<sup>5708</sup> El mismo fenómeno se dió en Caracas (Lucena Salmoral, 1976, 481-88).

<sup>5709</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

<sup>5710</sup> Nacido en Huéspeda, Arzobispado de Burgos, hijo de Mateo Martínez y de Antonia de Hoz; y marido

---

de María Josefa de Castro, hija del comerciante Blas Alonso de Castro y de Magdalena de Almandos (FB, I, 72; y IV, 287; y JR, 1989, ítem 4826).

<sup>5711</sup> natural de la Villa de Torruella de Mongrín, Obispado de Gerona, Cataluña, hijo de Juan Viola y María Angela Pascual; y marido de María Ignacia Ibáñez de Echavarri, hija de Pascual Ibáñez de Echavarri y de Gabriela de Basavilbaso (JR, 1989, ítem 5465; y FB, IV, 46).

<sup>5712</sup> Nacido en Bilbao, hijo de Agustín de Erézcano y de María de Ocerín, casado en 1778 con María Eugenia Azcuénaga, hija de Vicente Azcuénaga y de Ramona de Basavilbaso; cuñado de Gaspar de Santa Coloma y del Virrey Antonio de Olague y Feliú; y suegro de José de Anzorena y Barón, natural del Tucumán (FB, 1986-90, I, 124 y 201; y II, 284; y JR, 1989, ítem 4669).

<sup>5713</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v. Los nombres de las mujeres los obtuve en JR, 1989, n.4669.

<sup>5714</sup> Comandante del Regimiento de Caballería de Montevideo, nacido en Utrera; hijo del Teniente Coronel de Milicias de Granada Francisco Castañón y de Sabina Reyna y Sáenz Montero de Espinosa; y casado en primeras nupcias con Dominga Almandos Puebla, hija de Francisco Almandós y Josefa Puebla; y en segundas nupcias con María Sabina Romagnon o Romairone, hija de Pedro Romagnon y de Francisca de las Cabezas; y padre del Coronel Bernardo José Castañón Almandós (FB, 1986-90, II, 102-103; y JR, 1989, ítem 4575).

<sup>5715</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

<sup>5716</sup> Caballero de Carlos III, Contador Mayor del Tribunal de Cuentas, nacido en Navaleno, Osma, Castilla; hijo de Francisco de Andrés y de Catalina de Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartolina de Arce y Báez de Alpoin; sobrino político de Juan de Vargas Machuca y de Blas Gazcón; y suegro del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Juan María de Almagro (FB, 1986-90, I, 118 y 140; y JR, 1989, ítem 4568).

<sup>5717</sup> Cutolo, 1968, 168.

<sup>5718</sup> Hijo de Antonio Gaspar de Pinedo Fernández de Valdivieso y de María Josefa de Montúfar y Frasco. Casó en primeras nupcias con Micaela Bilbao La Vieja y Peñaranda, hija de Antonio Bilbao La Vieja y Angela de Peñaranda; y en segundas nupcias previa dispensa con su prima Rafaela Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay y Presidente de la Real Audiencia de Charcas General Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (FB, 1986-90, V, 207; Socolow, 1987, 118; y JR, 1989, ítem 4722).

<sup>5719</sup> Hijo de Francisco Pedro de Casamayor y Abadie y de María Luz García de la Calle Robles (FB, 1986-90, II, 86).

<sup>5720</sup> Nacido en Navarrete, Logroño, hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de Otárola. Casó en primeras nupcias en 1752 con Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en segundas nupcias en 1764 con Victoriana Cabrera, hija del Contador de la Real Hacienda y Caballero de Santiago Francisco de Cabrera y de Antonia de Saavedra. Fué suegro del Contador del Tribunal Mayor de Cuentas José María Romero (Ezcurra Medrano, 1966, 128-138; FB, 1986-90, IV, 309; y JR, 1989, ítem 5207).

<sup>5721</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 44.

<sup>5722</sup> Caballero de la Orden de Carlos III. Nacido en Málaga en 1756, hijo de Ramón Antonio de Oromí y Castelló y de Agustina Martiller y Gómez Tubilla; marido de Indalecia Agustina de Lasala y Fernández de Larrazábal, hija de Juan Bautista de Lasalle y Bauchalet, conocido por La Sala, y de Juana Agustina Fernández de Larrazábal; y suegro de Manuel de Escalada, de Saturnino de Nadal y Guarda, y del Dr. Luis María Moxó y López (Martínez Gálvez, 1961, 268-269; Mariluz Urquijo, 1974, 142-143; y FB, 1986-90, IV, 402; y V, 9 y 78).

---

<sup>5723</sup> Hija del Gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo, natural de Burgos, Asturias, y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (JR, 1987, ítem 2951; y JR, 1989, ítem 4568).

<sup>5724</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 51. Nacido en Osma, hijo de Francisco Andrés y de Catalina de Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Juan María de Almagro y de la Torre (Ibarguren, 1961, 22; y FB, I, 118).

<sup>5725</sup> Nacido en Malaga, hijo de Antonio Alonso de Almagro Madroñel y de Juana María de la Torre Caballero; sobrino del Coronel Francisco Almagro de la Torre; casado en primeras nupcias con su prima Joaquina Ruiz Román, hija de Francisco Ruiz Román y de Teresa González de Godoy; y en segundas nupcias con Ana de Andrés de Arroyo y Pinedo, hija de Juan de Andrés de Arroyo y de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Nicolás Sacristi y de Nicolás Rivarola (Schulkin, 1961, 33-42; FB, 1986-90, I, 71; y JR, 1989, ítem 6089).

<sup>5726</sup> Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano ajena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

<sup>5727</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

<sup>5728</sup> Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecochea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (FB, 1986, I, 33).

<sup>5729</sup> Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

<sup>5730</sup> En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

<sup>5731</sup> Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo, hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fiado con comerciantes porteños por valor de \$12.399. El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa, XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN, Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11; Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General Vicente Nieto perdió Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita, Huaqui y Sipe-Sipe. Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (Cutolo, III).

<sup>5732</sup> Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN,

---

Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250). En 1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fiado por valor de \$124.284 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro 1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcu, mujer del Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de Ramón de Roxas y Orueta (Aranzaes, 1915, 303).

<sup>5733</sup> Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Seguro, hija de Francisco de Seguro y de María Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804 contrajo media docena de operaciones de fiado por valor de \$55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.; Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

<sup>5734</sup> En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

<sup>5735</sup> Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

<sup>5736</sup> Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (Lazcano, I, 28).

<sup>5737</sup> socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

<sup>5738</sup> Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y con cuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

<sup>5739</sup> Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

<sup>5740</sup> Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el suegro del Brigadier General Don Sebastián de Seguro (Aranzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

<sup>5741</sup> Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

<sup>5742</sup> Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de Soca, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguería, ha caído con el tiempo en la mayor inopia, hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo, inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por donativo gracioso para él y sus hijos,

---

prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X, 106).

<sup>5743</sup> Capitán de Milicias, Azoguero del partido de Tinta, Potosí, y Alcalde de Hermandad de la Villa de Potosí. Era hijo natural de Juan de la Torre y Ana María Cardozo "...ambos a dos tenidos y reputados por personas nobles y distinguidas en estas Provincias" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Casó con María del Carmen Carrasco. Su testamentaria se abrió en 1801 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.50, Exp.4)..

<sup>5744</sup> Oidor Honorario de Charcas Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete al Sr. Gobernador Intendente Francisco de Paula Sanz, Potosí, 26 de enero de 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12).

<sup>5745</sup> *Ibidem*.

<sup>5746</sup> *Ibidem*.

<sup>5747</sup> *Ibidem*.

<sup>5748</sup> Luego se arrepintió del apoyo brindado a dicha facción para comenzar a atacarla duramente (Saguiet, 1989). Sobre Cañete, ver Just Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361.

<sup>5749</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

<sup>5750</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

<sup>5751</sup> *Idem*.

<sup>5752</sup> Alvarez, 1966.

<sup>5753</sup> Por crisis de estado se entendería, a criterio de Goldstone (1986), una situación en la cual una administración central que alega soberanía sobre un territorio y una población dados es incapaz de imponer su autoridad y sus leyes o recaudar sus impuestos a una porción significativa de su territorio y población.

<sup>5754</sup> Blanco Fombona, 1911, 29 y 45; André, 1922, 78; Maeztu, 1942, 42; Felstiner, 1976, 67 y 74; y Mires, 1988, 70-78.

<sup>5755</sup> Trindade, 1986, 144.

<sup>5756</sup> Taylor, 1987, 199.

<sup>5757</sup> ver Cotta, 1988; y Saguiet, 1991 y 1993.

<sup>5758</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

<sup>5759</sup> Natural de Galicia, hijo de Jacobo Acuña y Ocampo, y de Juana de Alomón Coello y Torrado, casado en 1772 con María de la Trinidad de Vera y Aragón, hija del Maestre de Campo Juan Ascencio de Vera y Sánchez de Loria, y de Josefa de Avila; y nieta paterna de Juan de Vera y Aragón y de Petronila Sánchez de Loria (Luque Colombres, 1973, 151). Padres de los Presbíteros Jacobo, Pedro Ignacio y Joaquín Acuña; de los Doctores Tadeo y Pío Acuña (abuelo del Gobernador de Catamarca Joaquín Acuña Molina); y de Josefa Acuña, mujer de Andrés Herrera (abuelos de los Gobernadores de Catamarca Marcos Figueroa Herrera, casado con Victoria Augier Molas, y de Julio Benigno Herrera González, casado con Carmen Castellanos Díaz de la Peña); de Tránsito Acuña, mujer de Juan Ignacio Soria y Medrano; y de Clara Acuña, mujer de Gregorio Ruza (Velasco Ledesma, 1946; Calvo, III, 13; I, 236; y Soria, s/f, 7, 203, y 238). Francisco Acuña registró como deudor en Buenos Aires una sola operación, en 1786, contraída con Xavier Saturnino Saraza, por valor de \$2.096 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.75).

<sup>5760</sup> Hijo del Teniente Gobernador de Catamarca Maestre de Campo Juan de Soria Medrano y Olmos de Aguilera y de su prima Josefa Olmos de Aguilera y de la Vega, casado con Justa Rivera, hija de Ignacio

---

Rivera y de Catalina Segura, hermana del Regidor Ramón Rivera (Calvo, V, 278). Fernando Soria Medrano era padre de María Isabel Soria, casada en 1808 con José María Burgos, de Juan Ignacio Soria, casado en 1802 con María del Tránsito Acuña, y de Segundo Soria, casado con Beatriz Navarro de Velazco, hija de Juan Diego Navarro de Velazco, VII Señor de Capayán, Villapuna, y Chancogasta, V Señor de Allega, y de María Antonia Segura y Guadalupe (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

<sup>5761</sup> Nacido en Catamarca en 1768, Alcalde, Tesorero de la Real Hacienda, hijo del Capitán Ignacio Olmos de Aguilera y Tres Palacios, y de Isabel Barrionuevo, casado en 1791 con Rosalía de Guzmán, padres de Carlos, Luis, María Salomé, Romana, Juana Luisa, y Casilda Olmos de Aguilera (Calvo, V, 132; y Soria, s/f, 181). José Olmos registró en Buenos Aires como deudor una sola operación, contraída con Tomás de Valansátegui en 1796, por valor de \$2.458 (AGN, Protocolos, Reg.1, 1796, fs.263).

<sup>5762</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

<sup>5763</sup> *Ibidem*.

<sup>5764</sup> *Ibidem*.

<sup>5765</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12. Así, por ejemplo, con relación a las elecciones de 1798, al Teniente de Milicias Victorino Ferreyra le constaba que el Defensor de Menores Maestre de Campo Pedro Pablo Ponce de León "...es pariente afínico [político] del Alcalde Juan Bustamante" y que el Regidor Alcalde de Aguas Marcelino Vera y Sánchez de Loria "...lo es también pariente afínico del Regidor suplente Don Santiago Leiva y sobrino afínico del Ministro Tesorero Don Francisco Acuña" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12).

<sup>5766</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.57, Exp.7, fs.49v. Don Feliciano fué Alcalde de primer voto y Oficial Interino de Correos de Santa Fé, hijo de Francisco Mota Botello y de Isabel Ruiz Gallo, y marido de Maximiliana Robin y Vera. En 1794 es Alcalde en el Cabildo de Catamarca, y en 1800 se propone rematar el empleo de Alferez Real de la misma (AGN, Hacienda, Leg.72, Exp.1912; Leg.96, Exp.2502; Tribunales, Leg.159, Exp.44-46; y Justicia, Leg.4, Exp.1206). En 1808 el Alcalde de Segundo Voto de Catamarca José Vicente Reinafé formula queja de su proceder como funcionario (AGN, Justicia, Leg.5, Exp.1511). En 1819 es designado Gobernador Delegado del Tucumán, siendo destituido por el Motín de Arequito, y reemplazado por Bernabé Aráoz. Botello registraba en Buenos Aires como deudor una sola operación, contraída con Agustín Casimiro de Aguirre en 1788 por valor de \$7.749 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1788, fs.283v.).

<sup>5767</sup> Hijo de Juan Manuel Correa Navarro y de María Antonia Soria Medrano y Olmos de Aguilera (Calvo, V, 278; y Soria, s/f, 57).

<sup>5768</sup> Hijo de Juan Antonio Salado, español, y de Isabel Segura, casado en 1779 con Teresa Barrionuevo (Soria, s/f, 209).

<sup>5769</sup> Hijo de Ignacio Rivera y de Catalina Segura, hermano de Justa Rivera, mujer del Regidor, Alcalde y Alferez Real Fernando Soria Medrano (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

<sup>5770</sup> Casado con María del Tránsito Serapia de Acuña y Vera, hija del Comandante de Armas Francisco de Acuña y Alonso Coello, y de Trinidad de Vera y Avila (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

<sup>5771</sup> Hijo de Fernando Soria y Olmos, y de Justa Rivera, y sobrino de los Regidores Ramón Rivera y José Antonio Olmos, Defensor General de Menores. Contrajo primeras nupcias en 1807 con Bernardina Segura, y segundas nupcias con María del Señor Navarro, hija de Juan Diego Navarro de Velazco, y de María Antonia Segura (Soria, s/f, 87, y 230).

<sup>5772</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

<sup>5773</sup> *Ibidem*.

<sup>5774</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.

<sup>5775</sup> Nacido en Buenos Aires en 1764, hijo de José Domingo de Ezquerrene y Axpide, y de Benedicta

---

Dominga Pacheco de Malaver y Peralta (Cutolo, 1963, 40). Acerca de Ezquerrenea, ver Nieva Malaver, 1936; y Cutolo, 1961, 64-75.

<sup>5776</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.

<sup>5777</sup> Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón, de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guiñazú, 1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

<sup>5778</sup> Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

<sup>5779</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

<sup>5780</sup> Fontana, 1962, 78.

<sup>5781</sup> Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortiz, y de Francisco Segura (Calvo, V, 39; y Morales Guiñazú, 1939, 73).

<sup>5782</sup> Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351; y Morales Guiñazú, 1939, 297).

<sup>5783</sup> Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

<sup>5784</sup> Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

<sup>5785</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

<sup>5786</sup> Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

<sup>5787</sup> Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

<sup>5788</sup> Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

<sup>5789</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

<sup>5790</sup> Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

<sup>5791</sup> Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110).

---

<sup>5792</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

<sup>5793</sup> *Ibídem*.

<sup>5794</sup> *Ibídem*, fs.25.

<sup>5795</sup> *Ibídem*, fs.26v.

<sup>5796</sup> Real de Azúa, 1961, 65, nota 74. Sobre la visión crítica de Real de Azúa, ver Block de Behar, 2003

<sup>5797</sup> Se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]].

<sup>5798</sup> Hijo del Maestre de Campo José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza; y de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

<sup>5799</sup> El Coronel Santiago Alejo de Allende, pese a su prestigio guerrero logrado en la represión del alzamiento indígena de Tupac Amaru, se había desacreditado por su fallida reconquista de Maldonado de manos del Ejército Inglés y por su fuga de la costa de Montevideo cuando el desembarco de las legiones de Achmuty (Cutolo, I, 151).

<sup>5800</sup> Nacido en Junio de 1773, hijo de José de Allende y Losa y de María Isidora de Ascasubi, casado con Petrona de Goicoechea, hija de Martín de Goicoechea y Tadea Grimau (LC, 1936, I, 16, y 36). José Norberto Allende era cuñado del Teniente Coronel Félix Mestre, primo hermano de Francisco Armesto y Allende, de Pedro Lucas y Santiago Alexo de Allende, y de la abuela del General Paz, y suegro de quién fuera Gobernador de Córdoba José Francisco Alvarez y de las Casas, hijo éste de Francisco Javier Alvarez y Arias, y de Francisca Carlota de las Casas y Pavón (LC, 1968, II, 151). José Norberto heredó la propiedad de la estancia de Saldán, y recién en 1865 su hijo Carmen L. de Allende y otros proponen la división o venta de la misma (AHC, Escribanía N.1, Leg.521, Exp.8).

<sup>5801</sup> Ambos eran hijos de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermanos menores de José Manuel Allende, y primos hermanos de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la Bárcena. También eran primos segundos de la madre del autor de las célebres Memorias, el General José María Paz, y primos terceros del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende y Torres casó con Inocencia Díaz de la Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de Juana Arias de Cabrera; y el Sargento Mayor Faustino de Allende y Torres casó con Rita Trinidad Moyano y Deza, hija de Gregorio Salvador Moyano y Cabrera y de Juana Deza y Moyano, dueños de las estancias Monte Redondo, Toro Guañusca, El Totoral, Talas y Pozo Grande. Rita Moyano era prima hermana carnal del Coronel Dalmacio Allende Moyano (LC, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

<sup>5802</sup> Era hijo de Nicolás de Cabrera Zeballos y de Tomasina de Allende Vicentelo, sobrino del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende, y nieto materno del General Tomás de Allende Losa Bravo (Díaz de Molina, 1966, 62). José Antonio Cabrera era primo hermano de la mujer de José Antonio de la Bárcena, y por

---

ende tío segundo del Coronel Manuel Bárcena.

<sup>5803</sup> Gaceta, 6-IX-1810, citado por AN, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

<sup>5804</sup> *Ibíd.*

<sup>5805</sup> Natural de Salta, hijo de Manuel Antonio Texada y de Catalina Fernández de Loria, y avecindado en Córdoba, casado con María Mercedes Funes y Luján, padres de Manuela Tejada, mujer de Braulio Piñero y del Castillo (Buscá-Sust, 1981, 84). Era sobrino político del Deán Funes.

<sup>5806</sup> Si bien el Coronel Dalmacio Allende Moyano era primo carnal en tercer grado de Tomás y Faustino de Allende, su parentesco con éste último era más cercano a través de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende, Doña Rita Moyano, de la cual era primo hermano (LC, 1969, III, 193). El Coronel Dalmacio Allende era también sobrino carnal en segundo grado de Nicolás Cabrera Zeballos, pues su madre Catalina Moyano era prima hermana de éste último (Calvo, 1924, 74).

<sup>5807</sup> Tonda, 1981, 139.

<sup>5808</sup> Nacido en marzo de 1777, hijo de José de Isasa y Ayesta, natural de San Sebastián, Alcalde de Primer Voto de Córdoba en 1795, y de María del Rosario Ponce de León, casado con Mercedes Caballero, hija de Lorenzo Caballero y de Josefa Ramírez de Arellano (Díaz de Molina, 1966, 204-208).

<sup>5809</sup> Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón.

<sup>5810</sup> Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón, casó con María Ignacia Funes y Allende, hija de Don Ambrosio Funes (Díaz de Molina, 1966, 150-154, y Mengo de Velásquez, 1983). Su padre era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

<sup>5811</sup> Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas y de Jerónima de Cabanillas, y casado con Romualda Moyano y Deza, hermana de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende y Torres.

<sup>5812</sup> Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas, Santanderino, dueño de la estancia de Macha, y de Jerónima de Cabanillas, y hermano de Gaspar del Corro.

<sup>5813</sup> Ambos hermanos eran hijos de Cipriano Moyano Quijano y de María Dolores Porcel de Peralta, casados con dos primas segundas del Coronel Santiago Alexo de Allende y Pedro Lucas de Allende, hijas de Juan Bautista Losa Bravo y Cabrera, y de María Mercedes Olmos y Aguilera (LC, 1936, I, 300; y III, 193). Cipriano Moyano era primo hermano de Catalina Moyano Cabrera, la mujer de José Antonio de Allende.

<sup>5814</sup> Converso, 1980; y Luque Colombres, 1973, 283-345.

<sup>5815</sup> Natural del Paraguay, nieto o sobrino de Juan Manuel Cano de la Pera. Fué dueño de los terrenos del Cerro de Aparipí, Paraguay, probablemente la estancia de Carandaipirú, que había litigado con los herederos de Sebastián Agüero (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4; y Aguirre, 1950, XIX, 165). Fué yerno del Alcalde de Córdoba Antonio del Castillo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1782 se le otorgan sus certificados por sus servicios militares (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro 16, f.143-159). Recalde había concertado entre 1757 y 1801 una decena de operaciones por la suma de \$34.651. Entre sus acreedores se encontraban Francisco Guerrero Villalobos, Juan Antonio Egusquiza, Pedro José Doye, María Josefa Balbastro, y Tomás de Valansátegui (AGN, Protocolos, Reg.1, 1757, fs. 8, 16, 55v., 107v., y 178; Reg.2, 1762, fs.220; y Reg.1, 1785, fs. 204.).

<sup>5816</sup> Había celebrado entre 1767 y 1775 tres operaciones con Baltasar Montis, Roque Sánchez y José Andonaégui por valor de \$17.648 (AGN, Protocolos, Reg. 6, 1767, fs.297v.; R.1, 1774, fs.208; R.4, 1775, fs.342; y R.3, 1775, fs.227).

<sup>5817</sup> Halperín Donghi, 1979, 70, 380, 384.

---

<sup>5818</sup> AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, Exp.11.

<sup>5819</sup> Gregorio Funes al Virrey, Córdoba, 24-VI-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

<sup>5820</sup> *Ibidem*. Dicha acusación recayó en los hermanos Funes, pese a ser Ambrosio Funes marido de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa.

<sup>5821</sup> AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18.

<sup>5822</sup> AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13.

<sup>5823</sup> AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22.

<sup>5824</sup> José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4).

<sup>5825</sup> José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

<sup>5826</sup> hijo de Salvador Súlivan y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

<sup>5827</sup> Fué miembro de la Academia de Práctica Forense de Chuquisaca (Cutolo, 1963, 114).

<sup>5828</sup> ver Gibert, 1947.

<sup>5829</sup> Ver Apéndice C-I correspondiente al tomo III.

<sup>5830</sup> Ya en 1754 el Comandante Félix Cabrera había enunciado la debilidad de los Cabildos, vis a vis el poder de los Gobernadores.

<sup>5831</sup> Los Roca de Tucumán con los Díaz de Córdoba, los Castellanos de Salta con los Anchorena de Buenos Aires, los Paz de Tucumán con los Cascallares de Buenos Aires, etc.

<sup>5832</sup> Sánchez de Tagle, 1982, 42-56.

<sup>5833</sup> Halperín Donghi, 1979, 209-210.

<sup>5834</sup> Mayo, 1987, 260.

<sup>5835</sup> había denunciado en compra en 1775 en lo que es hoy Entre Ríos 60 leguas cuadradas, situadas entre el Arroyo de la China en su desembocadura con el Río Uruguay, hasta el Río Gualaguaychú, denominadas Potrero de San Lorenzo, por compra a Manuel Caraballo, quien las había adquirido de igual forma de Bartolomé Díaz de Andino, descendiente de conquistadores (Pérez Colman, III, 284).

<sup>5836</sup> hijo de Alonso García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; marido de Francisca Josefa Warnes y Arráez; y cuñado del Administrador de las Misiones Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Manuel Antonio Warnes, José María Calceite, y Juan Ignacio de Elía (Fernández de Burzaco, III, 153).

<sup>5837</sup> FB, III, 153.

<sup>5838</sup> FB, II, 133; III, 138; y VI, 216; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 6594.

---

<sup>5839</sup> Mariluz Urquijo, 1987, 108.

<sup>5840</sup> Correa Luna, 1918, 225.

<sup>5841</sup> En 1795 figuraban como Coroneles de Ejército el Marqués de Casa Hermosa, Andrés Ordóñez, el Conde de Liniers, Domingo Chauri, Pascual Ibáñez de Echavarri, Francisco Bruno de Zavala, José Ignacio Quintana y Bernardo Lecocq; como Tenientes Coroneles de Ejército Miguel Zamora, Francisco Cavallero, Joaquín Alós, Sebastián Pizarro, Joaquín Antonio Mosquera, Francisco Orduña, Juan de Salas, José Ignacio de Merlos, Manuel Gutiérrez, José Calaceite, Gaspar de la Plaza, Francisco Rodrigo, Tomás de Rocamora, Pedro de Arze, Félix de Iriarte, Vicente Ximénez, Manuel Soler y Francisco García Carrasco; y como Sargentos Mayores de Ejército Miguel Fermín de Riglos y Nicolás de la Quintana (AGN, División Colonia, Sala IX, 1-8-2)

<sup>5842</sup> El clero era la única institución que contaba con congrua por estar fundada en la capellanía. El nepotismo clerical se daba predominantemente entre tíos y sobrinos.

<sup>5843</sup> Gobernador del Paraguay y Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

<sup>5844</sup> marido de Juana Albizuri y Echauri, hija del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti.

<sup>5845</sup> nacido en Portugaleta, Vizcaya; hijo de Miguel de Larrazábal y de María Antonia de Basualdo; y marido de Agustina Avellaneda, hija de Gaspar de Avellaneda y de Juana de Lavayén (FB, IV, 113).

<sup>5846</sup> Gobernador del Paraguay y Caballero de Santiago, hijo de Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; contrajo primeras nupcias con Mariana Arrascaeta, hija del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar y de María Ferreira de Acevedo, y hermana del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta y del Alcalde de primero y segundo voto Gregorio Arrascaeta; y segundas nupcias con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos; cuñado del ex-Gobernador del Paraguay Coronel de Ejército Martín José de Echauri, de Juan de Otárola, del comerciante registrero José Antonio de Iturriaga, del Gobernador de Tucumán Gregorio de Matorras, de Martín de Arraiz y de Pablo de Aoiz; y concuñado de Francisco de Espinosa Moxica de los Monteros, de Ignacio Irigoyen, del Teniente Coronel Juan Antonio Marín, y del Comandante Domingo de Lajarrota (FB, IV, 114; y V, 253; y JR, 1987, ítem 1415; y 1989, ítem 4210).

<sup>5847</sup> nacido en Coria, Extremadura; hijo de Jacinto Marín y de Mauricia Antonia; marido de María Rosa Estefanía de la Quintana y Riglos (FB, IV, 243).

<sup>5848</sup> Corregidor y Caballero de Alcántara, suegro del Teniente Coronel Agustín Casimiro de Aguirre y de José Manuel Prudent (FB, IV, 101).

<sup>5849</sup> Cutolo, I, 206.

<sup>5850</sup> FB, IV, 94.

<sup>5851</sup> nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaquirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165).

<sup>5852</sup> Gobernador del Paraguay, yerno de Gaspar de Bustamante, quien en nombre del Real Derecho de Alcabala, le iniciara en 1736 una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba, cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires procedentes del Paraguay. Bustamante concluyó que el cura Ruiloba defraudaba a la Real Hacienda reduciendo "...sus dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.).

---

<sup>5853</sup> Cabodi, 1950, 135, nota 260; y FB, IV, 285.

<sup>5854</sup> Cabodi, 1950, 135, nota 260.

<sup>5855</sup> Calvo, IV, 230. Este último fue Alcalde de Asunción y fundador del Fuerte Borbón (luego Olimpo).

<sup>5856</sup> Veterano de las Guerras Guaraníticas. Casó con la hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, natural de Bilbao, quien llegó al Río de la Plata en 1696 con su tío Juan de Zamudio, y de Ana Maciel, hija a su vez del Teniente Gobernador General Baltasar Maciel y de Gregoria Cabral de Melo. Don Sebastián Casajús manifestaba que Don Nicolás Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento, y como todos somos unos pobres por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su adbitrio, benerando sus dictámenes como evangelios" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp.8, fs. 9).

<sup>5857</sup> Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y de Ana Maciel, con cuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y padres de Antonia Rosa de Lagraña, mujer del Teniente Gobernador de Corrientes Coronel Juan García de Cossio y Gómez de Cossio (CC, I, 299; Labougle, 1953, 170).

<sup>5858</sup> Melchor de Rojas Aranda al Gobernador del Río de la Plata, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

<sup>5859</sup> *Ibidem*.

<sup>5860</sup> *Ibidem*.

<sup>5861</sup> Hijo de Bernardo Casajús y Fernández de Aranda y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús. Cuando su madre enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús, hija de Sebastián Casajús y María Carvalllo. Era cuñado del Regidor José Ignacio de Beláustegui, de los Alcaldes José Sánchez Moreno y Manuel González de Horduña, y de Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis Cabral y Soto.

<sup>5862</sup> Nacido en Corrientes en 1715, hijo de María Sandoval, Alcalde de Primer Voto en 1754 y 1769, Tesorero de Real Hacienda en 1755-64, Procurador General en 1785, participó en la Guerra Guaranítica y se adhirió a la rebelión Comunera de Corrientes (Maeder, 1987, 348; y 1988, 123). Fué padre de Don José Ignacio Añasco, casado con hija de Doña Rosa Ramírez.

<sup>5863</sup> Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaíso (Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; Maeder, s/f, 87). Como Gobernador de Misiones fué designado a renglón seguido de Bernardo Garmendia (Damianovich, 1987, 119).

<sup>5864</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

<sup>5865</sup> En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por un estamento o clase de corregidores.

<sup>5866</sup> Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2).

<sup>5867</sup> Hijo del Gobernador del Paraguay Fulgencio Yegros y Ledesma y de Tomasa Franco Torres; nieto del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de su parienta Angela de Franco Torres; y padre del Coronel Fulgencio Yegros (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252).

<sup>5868</sup> Asistente del Gobernador Carlos Morphy en la operación de expulsar a los Jesuitas (Rivarola Paoli, 1988a, 148)

---

<sup>5869</sup> Comandante de la Villa de Concepción, hijo del encomendero Ramón de Espínola y de Rosa de la Peña (Spangenberg, 1992, 378), y primo del Capitán Juan Ignacio Caballero, muerto en la Guerra de las Naranjas (Frakes, 1989, 505). Autor de "Eploración del Gran Chaco que llevó a cabo por mandato del Sr. Don Joaquín de Alós, teniente coronel de los Reales Ejércitos Don José de Espínola y Peña", editado por Blas Garay (Asunción, 1899). Fué brazo derecho del Gobernador Lázaro de Ribera (Furlong, 1954, 45). Para más información ver Molas, 1957, 96; y Cháves, 1959, 26.

<sup>5870</sup> Velázquez, 1981, 258.

<sup>5871</sup> Alvarenga, 1978, 205.

<sup>5872</sup> Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17). Era hermano del Procurado General de la Villa de Madrid Antonio Gaspar de Pinedo Fernández de Valdivieso (marido de María Josefa de Montúfar y Frasco); marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce, del comerciante Juan de Vargas Macías, y de Blas Gazcón; padre del Coronel Agustín José de Pinedo, quien fuera marido de Juana María de Albizuri y Echauri; suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y del Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar; y tío político de Pedro Vicente Vargas Arce y José y Mariano Gazcón Arce (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

<sup>5873</sup> Saeger, 1981, 69-70.

<sup>5874</sup> Lynch, 1958, 209.

<sup>5875</sup> José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo Ysfrán, Camboño, Barrazabal, Melo, Lafuente, y Arias Saravia, en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)" (manuscrito inédito).

<sup>5876</sup> Es muy probable que Ocampo halla conocido en Córdoba al R.P. José Manuel Peramás S.J., cuya cultura poética era vastamente conocida, y de quien pudo haber aprendido la técnica de la décima (Furlong, 1925-26; y 1946, 145-155). Peramás estuvo en Córdoba entre 1755 y 1758, para luego irse a las Misiones Jesuíticas y volver a Córdoba en 1763, donde se quedó hasta su expulsión (Furlong, 1937, y 1952, 13).

<sup>5877</sup> Grenón, 1922, 3-4, citado por Bazán Lazcano, 1973, 501, nota 31.

<sup>5878</sup> Serrano Redonnet, 1979, 180.

<sup>5879</sup> casado con María Francisca Cubas y Herrera, hermana de Don Nicolás Cubas, vecino feudatario de Catamarca (Serrano Redonnet, 1944, 58). Fué padre de Juan Gregorio Gómez y Cubas, marido de María de la Trinidad Villafañe y Luna; y suegro de Pedro Miguel del Moral y Andrade (Serrano Redonnet, 1945, 58; y Lascano Colodrero, III, 175).

<sup>5880</sup> Grenón, 1922, 256; y Carrizo, 1942, III, 413-415

<sup>5881</sup> Acerca del nepotismo en el clero, ver Michaud-Quantin, 1978, 86. Acerca del nepotismo en el clero inglés, ver Gibson, 1987, 1993. Para Gibson (1993), el debate sobre el nepotismo en la Iglesia ha engendrado puntos de vista opuestos. La interpretación tradicional lo visualiza como un rasgo de la corrupción y el abuso que asoló a la Iglesia en los años posteriores a la sucesión de la dinastía Hanoveriana de 1714. El punto de vista opuesto sugiere que el nepotismo no sólo sirvió una función específica, como lo hizo en el laicado; sino que los contemporáneos le acordaron legitimidad moral (Gibson, 1993, 180).

---

<sup>5882</sup> ver asimismo los comentarios de Varón (1994) y Lavallé (1994).

<sup>5883</sup> Tiene su antecedente en el siglo XVII, en los Capítulos Conventuales de las Ordenes Religiosas, cuando se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955).

<sup>5884</sup> Auto de erección de la Catedral y Reales Cédulas del 1-IV-1774 y del 5-IX-1803 (Avella Cháfer [en adelante A-Ch], I, 21).

<sup>5885</sup> Altamira, 1949, 71; y A-Ch, 1983, I, 21.

<sup>5886</sup> hermano del Asesor de la Gobernación Victorino Rodríguez. Obtuvo por oposición el curato de Anejos en 1777 y el curato de La Punilla en 1780.

<sup>5887</sup> Altamira, 1949, 58, nota 38.

<sup>5888</sup> A-Ch, 1983, 54; y 119-120.

<sup>5889</sup> El nepotismo militar era escaso por carecer de congrua sustentación y cuando prevalecía lo era en la relación entre suegros y yernos.

<sup>5890</sup> Fernández de Burzaco [en adelante FB], I, 231; II, 143 y 173; III, 263; V, 381 y 408; IV, 343; y VI, 149; y A-Ch, 1983, 139, 157 y 205.

<sup>5891</sup> AGN, Protocolos, Registro 3, año 1739, fs.114v.

<sup>5892</sup> FB, V, 77 y 381; y A-Ch, 1983, 139.

<sup>5893</sup> A-Ch, I, 139 y 205.

<sup>5894</sup> FB, II, 214.

<sup>5895</sup> Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziel y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186. María Josefa Bazurco, hermana del Obispo de Buenos Aires había depositado en Maziel "...una confianza ilimitada encargándole la administración de sus bienes y nombrándole albacea en su testamento" (Probst, 1946, 67).

<sup>5896</sup> hija del Capitán Francisco Bazurco y de Juana María de Herrera Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco (FB, I, 252).

<sup>5897</sup> Mayo y Peire, 1991, 155.

<sup>5898</sup> Levaggi, 1992, 110.

<sup>5899</sup> Altamira, 1943, 166; y en el AAC, Expedientes de Ordenes, Leg. 24, t.I; y Libro de Capellanías, Leg.31, t.VIII (Microfilms 2738 y 5633, del Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF). Esta capellanía fué litigada por José María Bejarano,

---

quien logró que el Dr. Gregorio Funes "...declarase el Patronato a mi favor consecuente con las disposiciones del fundador...mas la negra envidia no dejó de oponer obstáculos, saliendo al juicio una parte ilegítima, cual lo fué Don Dalmacio Allende, valido de la prepotencia, séquito y conexiones que disfrutaba en el Pueblo" (AGN, Tribunal-Civil, Leg. B-4).

<sup>5900</sup> Altamira, 1943, 224.

<sup>5901</sup> AAC, Libros de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

<sup>5902</sup> AAC, Libros de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

<sup>5903</sup> marido de Francisca Arias de Molina y Jofré.

<sup>5904</sup> Verdaguer, 1931, I, 594, 602, y 626.

<sup>5905</sup> Verdaguer, 1931, I, 594, 602 y 626.

<sup>5906</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VIII (Microfilm 5633, del CHF).

<sup>5907</sup> Verdaguer, 1931, I, 636.

<sup>5908</sup> Idem, I, 610.

<sup>5909</sup> Idem, I, 598.

<sup>5910</sup> Idem, I, 592.

<sup>5911</sup> Idem, I, 591.

<sup>5912</sup> Saguier, 1989, 290.

<sup>5913</sup> Verdaguer, 1931, I, 626. En 1813, el Pbro. Vicente Atencio demandó a José María Echegaray y Toranzos, como apoderado de su hermano Manuel, ausente hacia más de quince años, la entrega de la capellanía de Santa Bárbara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

<sup>5914</sup> Verdaguer, 1931, I, 434, 585 y 605.

<sup>5915</sup> Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

<sup>5916</sup> Olaechea Labayén, 1975.

<sup>5917</sup> En el plano civil este proceso se llevaba a cabo mediante las "gracias al sacar" (ver Cortés, 1978).

<sup>5918</sup> Robinson, 1979, 284, nota 13.

<sup>5919</sup> Larrouy, 1927, 362, 364 y 366.

---

<sup>5920</sup> Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, correspondiente al Microfilm 2679, depositado en el Centro de Historia Familiar.

<sup>5921</sup> A-Ch, I, 108.

<sup>5922</sup> Altamira, 1943, 146.

<sup>5923</sup> fué designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José Agustín Álvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

<sup>5924</sup> Acevedo, 1965, 457.

<sup>5925</sup> ver Mayo (1982).

<sup>5926</sup> FB, II, 185 y 204; III, 21, 35, 61, 101, 102, 123 y 148.

<sup>5927</sup> FB, V, 433.

<sup>5928</sup> Idem, V, 126.

<sup>5929</sup> Idem, IV, 282.

<sup>5930</sup> Idem, VI, 318.

<sup>5931</sup> Idem, II, 204.

<sup>5932</sup> FB, I, 225; III, 114; y II, 115.

<sup>5933</sup> FB, III, 188.

<sup>5934</sup> Idem, III, 287.

<sup>5935</sup> Debo esta reflexión a mi colega Oscar Chamosa.

<sup>5936</sup> Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

<sup>5937</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>5938</sup> Saguier, 1991.

<sup>5939</sup> Maeder, 1981, capítulo VI.

<sup>5940</sup> Saguier, 1991.

<sup>5941</sup> Saguier, 1989.

<sup>5942</sup> Acuerdo del 4-I-1809.

<sup>5943</sup> Tjarks, 1962, 486.

<sup>5944</sup> Socolow, 1987, 157.

<sup>5945</sup> Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

---

<sup>5946</sup> Para comparar con la larga agonía del imperio otomano, ver Mayer, 1981, 1984.

<sup>5947</sup> Domínguez (1985) cita al africanista Lofchie (1964) para fundar su concepto sobre la apropiación de legitimidad.

<sup>5948</sup> Marramao, 1998, 82-83; y Voegelin, 2006, capítulo 3.

<sup>5949</sup> Para el rechazo de las hipótesis plausibles, ver Domínguez, 1985, 264-267.

<sup>5950</sup> Ipola, 1989, 120; y Rozitchner, 1985, 115.

<sup>5951</sup> Para las dificultades en la construcción del estado nacional en el Perú (1821-1900), ver Gonzáles, 2001.

<sup>5952</sup> Para la desintegración de la economía en el interior del espacio colonial (1800-1860), ver Irigoin y Schmidt, 2003. Sobre Potosí, la crisis colonial y las bases del crecimiento económico del Río de la Plata después de la independencia, ver Mira y Gil Lázaro, 2003.

<sup>5953</sup> Sobre el colapso de los imperios ibéricos del Plata (1808-1828), ver Garrido Pimenta, 2002.

<sup>5954</sup> Sobre la Metanastasis, ver Meabe, 2004.

<sup>5955</sup> Posteriormente, luego del suicidio de Alem, Hipólito Yrigoyen incorporó a su discurso político pensamientos proféticos extraídos del credo Krausista (ver Roig, 1969). Sobre los elementos proféticos en las revoluciones puritanas, jacobinas, bolcheviques y jihadistas, ver Walzer, 1982.

<sup>5956</sup> Para explicar los cambios de régimen político, Huntington elabora cinco modelos: el cíclico, el de segundo intento, el de la democracia interrumpida, el de la transición directa, y el de la descolonización (Huntington, 1994, 50-51).

<sup>5957</sup> Sobre la noción de ciudadanía, ver Bendix, 1974, 78.

<sup>5958</sup> Colegios Nacionales, Ley Avellaneda o de Autonomía Universitaria, Ley Láinez o de Educación Obligatoria, periódicos, telégrafos, ferrocarriles, Ley de Matrimonio Civil, etc.

<sup>5959</sup> 11 de Septiembre, 1852; Cepeda, 1861; Pavón, 1862; Guerra de la Triple Alianza; La Verde, 1874; el Ochenta, 1880; el Noventa, 1890; el Noventa y Tres, 1893; el Cinco, 1905; 1930; 1943; 1955; 1962; 1966; y 1976. Para la correlación entre las guerras inter-estatales y los ciclos de Kondratiev, ver Thompson y Zuk, 1982.

<sup>5960</sup> Las Leyes Electorales fueron las Leyes 140-57, 207/59, 75/63, 623/73, 759/77, 3289/95, 4161/02, y 8871/12.

<sup>5961</sup> Mayo, Caseros, Pavón, y las revoluciones de 1880, 1890 y 1930, y numerosas revoluciones locales o provinciales.

<sup>5962</sup> Ortega y Gasset estuvo influido por Ranke, Dilthey, Dromel, Lorenz, Pareto y Spengler. Croce (1943), al referirse a Lorenz (1886-91), sostuvo que este no pareció "...tomar en consideración que en la historia son las ideas las que forman y califican a las generaciones y no al revés" (Croce, 1943, 100; citado en Ferrater Mora, 1984, II, 1337). Para mayores detalles acerca de la teoría de las generaciones, ver Martínez de Codes, 1986, 128-129; y Verani, 1992, 778-781.

<sup>5963</sup> Martínez de Codes, 1986, 131-132.

<sup>5964</sup> Si bien el primer ciclo ideológico debiera ser aquel que se inició con la idea de colonización, que arrancó con el Renacimiento y se prolongó con la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, para Rivarola el primer ciclo ideológico se inició con la idea de independencia, que arrancó con el Iluminismo y la Revolución Francesa (1791); el segundo con el pensamiento Utilitarista de Hume, Smith, Bentham y Mill, y

---

la idea de un Congreso General Constituyente (1821); el tercero con el pensamiento de Alberdi y la idea de la unidad o integración del estado nacional (1851); el cuarto con la llamada Generación del 80 (Mansilla, Zevallos, Wilde, Cané, González) y la idea de la democracia o el sufragio libre e independiente (1881); y el quinto con la llamada Generación del 900 (Ingenieros, Bunge, Ugarte) y la idea de la reparación nacional (1911). Proyectando en el tiempo la tesis de Rivarola hallaríamos un sexto ciclo en las ideas proteccionistas e industrialistas de la década del 40; y un séptimo ciclo en las ideas dependentistas y tercermundistas de la década del 60. El inconveniente de esta periodización es su reduccionismo, que sujeta el análisis histórico a una sola variable, la ideológica. Según Ancarola (1975), Rivarola estuvo influido en sus últimos tiempos por las ideas Kantianas de Ortega y Gasset (Ancarola, 1975, 21, nota 13).

<sup>5965</sup> En el primer ciclo, la idea-fuerza independentista, iniciada durante la Revolución Francesa, estalló positivamente en 1810. En el segundo ciclo, la idea de un Congreso General Constituyente estalló negativamente con la firma del Pacto Federal de 1831, que otorgó hegemonía a Buenos Aires. En el tercer ciclo, la idea de la unidad nacional, estalló positivamente en Pavón. En el cuarto ciclo, el ideal democrático del sufragio libre estalló en la Revolución del 90. Y en el quinto ciclo, la idea de la reparación nacional estalló negativamente en la Revolución de 1930 (Rivarola, 1936, 157). Proyectando retrospectiva y prospectivamente en el tiempo la tesis de Rivarola, en un primitivo ciclo, la idea de colonización, iniciada con la Conquista, estalló a mediados del siglo XVI con las llamadas Guerras Civiles del Perú; en el sexto ciclo, la idea de una Argentina industrial y autosuficiente habría estallado en la Revolución de 1955; y en el séptimo ciclo, la idea de una Argentina socialista habría estallado negativamente en el golpe de estado de 1976 y el baño de sangre que le siguió.

<sup>5966</sup> Martínez de Codes, 1986, 146-150.

<sup>5967</sup> gabinetes ministeriales, convenciones constituyentes, legislaturas, colegios electorales, magistraturas, partidos políticos nacionales y provinciales; cuerpo eclesiástico; directorios de los bancos; cuadros de oficiales; cuerpo docente de los colegios y universidades; cuerpo de redacción de los periódicos; y funcionarios de correos y telégrafos.

<sup>5968</sup> Sobre la modernidad absolutista borbónica en España, ver Domínguez Ortiz, 1976. Acerca de la exigüidad de la sociedad civil como causal del fracaso de la revolución de independencia, ver Pagden, 1991, 231-232.

<sup>5969</sup> auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930.

<sup>5970</sup> mientras "...el republicanismo abreva en la antigüedad clásica, el liberalismo es una doctrina típicamente moderna" (Naishtat, 2002, 234).

<sup>5971</sup> Thompson y Zuk, 1982, 623.

<sup>5972</sup> entre ellos los trabajos de Carlos Calvo, Atilio Cornejo, Morales Guinazú, Lascano Colodrero, Allende Navarro, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y Fernández Burzaco, identificados de ahora en más con las siglas CC, AC, MG, LC, AN, CN, JR y FB respectivamente.

<sup>5973</sup> los Gobernadores mendocinos Rufino Ortega, Emilio Civit y Oseas Guinazú, y el Interventor Francisco Uriburu (1870-98); los Gobernadores santafesinos Simón de Iriondo, José Gálvez, Juan Bernardo Iturraspe y Luciano Leiva (1878-1898); los gobernadores cordobeses Antonio Del Viso y Miguel Juárez Celman; los Gobernadores tucumanos Miguel M. Nougués, Próspero García, Lucas A. Córdoba y Benjamín Aráoz (1878-98); los Gobernadores santiagueños Manuel Taboada, Gabriel Larsen del Castaño, Pedro José Lami, Luis G. Pinto y Absalón Rojas (1860-83); los Gobernadores salteños Delfín Leguizamón, Pío Uriburu, y Robustiano Patrón Costas (1878-1918) y el Senador Francisco J. Ortiz; los Gobernadores jujeños Martín Torino, Pablo Blas, y Teófilo y Plácido Sánchez de Bustamante (1878-1883), el Juez Teodosio Temístocles Carrizo y el Senador Domingo T. Pérez; los Gobernadores puntanos Rafael Cortés, Jacinto Videla, Gregorio Guinazú y los hermanos Eriberto y Toribio Mendoza Lucero (1876-1906); los Gobernadores sanjuaninos Agustín Gómez, Anacleto Gil, Manuel M. Moreno, Vicente Mallea y Carlos Doncel, y los Legisladores Juan P. Albarracín, Rafael Igarzábal, Mataniel Morcillo y Juan José Videla; los Gobernadores riojanos Francisco V. Bustos, Jamín Ocampo, Vicente Almandós Almonacid y Guillermo San Román (1878-1898); el Diputado catamarqueño Félix F. Avellaneda y los Gobernadores catamarqueños Octaviano Navarro, José Silvano Daza y Gustavo Ferrari (1878-1899); los Gobernadores correntinos Manuel Derqui y Antonio Gallino; los

---

Gobernadores entrerrianos José Francisco Antelo, Eduardo Racedo, Leónidas Echagüe, Sabá Hernández, y Salvador Maciá (1877-1900); y el Inspector de Sucursales del Banco Nacional (Rafael de la Plaza).

<sup>5974</sup> Pimenta, 2002, 89.

<sup>5975</sup> Pimenta, 2002, 156.

<sup>5976</sup> Para los usos de los conceptos de nación y la formación del espacio político en el Río de la Plata (1810-1827), ver Goldman y Souto, 1997.

<sup>5977</sup> De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

<sup>5978</sup> Trimberger, 1978, 439.

<sup>5979</sup> Trimberger, 1978, 440.

<sup>5980</sup> Garavaglia, 1973a, 20.

<sup>5981</sup> Knight, 1990, 176.

<sup>5982</sup> Esquivel Obregón, 1918; Pereyra, 1908, 1920; André, 1922; Edwards, 1928; Maeztu, 1934, 1942; Encina, 1935, 1943-52; Jane, 1942; Eyzaguirre, 1942, 1946; Jiménez Fernández, 1946; Palacio, 1954; Sierra, 1956-72; Delgado, 1960; Hernández Arregui, 1963, 1966; Vedota, 1973; Stoetzer, 1979; Muñoz Pérez, 1982, y últimamente König, 1996..

<sup>5983</sup> Hardt y Negri, 2002, 101. Para el estudio de la legitimidad Moreniana, ver *La Gaceta* del mes de mayo de 1810. Sobre la inversión ideológica de Monteagudo y su propaganda monarquista en el Gobierno de San Martín en el Perú, ver Guerrero Lira, 2006.

<sup>5984</sup> Sobre el pasado prehispánico y los Padres de la Patria durante el siglo XIX, ver Earle, 2002. Para la conciencia política y la identidad nacional en la lucha latinoamericana por la independencia, 1808-1826, ver Sor, 2001.

<sup>5985</sup> seguidos por Matienzo (1910), Levillier (1912), Ingenieros (1918), Ravignani (1938) y Levene (1952).

<sup>5986</sup> Sobre la idea política moderna del poder en Jean Bodin, ver Anderson, 1979, 44-46. Sobre la noción de pacto en Althusius, Bodin, Hobbes y Locke, ver Elazar, 1998. Y sobre el concepto iluminista de nación, ver Palti, 2002, 31-35. Sobre el Iluminismo y el iusnaturalismo en el ideario de los juristas de la primera mitad del siglo XIX brasileiro, ver Lima Lopes, 2003.

<sup>5987</sup> García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier, 1984, 24. Sobre las nociones genealógicas y anti-genealógicas del concepto de nación, ver Palti, 2002.

<sup>5988</sup> Comunicación personal de Joaquín E. Meabe. Para la agenda de la legitimidad y su teorización, ver Meabe, 2005.

<sup>5989</sup> González, 1888, libro primero, II. Sobre el genealogismo mítico germanista de Thierry y Guizot, ver Catroga, 1992. Ver también Pimenta, 2002, p.162, nota 1.

<sup>5990</sup> Sobre Bolivia y la Audiencia de Charcas, ver Finot, 1934. Sobre el Uruguay independiente, ver Pivel Devoto, 1949.

<sup>5991</sup> Para el pensamiento de Bernardo Berro, ver Myers, 1995.

---

<sup>5992</sup> Para una nueva historia de la Guerra del Paraguay, ver Doratioto, 2002.

<sup>5993</sup> Para la Guerra del Pacífico desde una perspectiva chilena, ver Bulnes, 1911-1919.

<sup>5994</sup> El concepto de “apropiación de legitimidad”, fue desarrollado por Domínguez (1985), y lo tomó prestado del africanista Michael Lofchie (1964), y quince años más tarde pasó a ser reelaborado por Francois-Xavier Guerra, en lo que este último denomina ecuaciones de transferencia de legitimidad (Guerra, 1998, 134-139).

<sup>5995</sup> Ver Guerra, 1998, 135-139. Sobre reclutas forzados y desertores de la Patria en Chile (1810-14), ver León Solís, 2002.

<sup>5996</sup> Espinosa Fernández de Córdoba, 1989, citado en Guerra, 1993, 65, nota 23.

<sup>5997</sup> Extrañamente Díaz-Caballero (2005) omite la mención de la obra de König. Lamentablemente el auspicioso trabajo de König estuvo tan mal traducido que su tesis principal no se alcanza a entender. Para referirse a la noción de “apelación”, el traductor emplea las nociones de “dedicación”, “ocupación” y “reclamación”, por lo que se pierde el sentido que seguramente quiso imprimirle su autor (ver König, 1996, 746, 747, 748, 749, 751 y 760). Para el patriotismo criollo y el mito del “indio leal al rey”, ver Earle, 2001.

<sup>5998</sup> ver König, 1996, 749-750; y Díaz-Caballero, 2005, 101 y 104. Para unas notas sobre la construcción de la identidad nacional del Brasil independiente, ver Rowland, 2003.

<sup>5999</sup> ver König, 1996, 746. Para la cultura oral (poemas y canciones) en el interior de la Argentina decimonónica, ver De la Fuente, 2000. Para las elites regionales y la construcción de un Estado nacional en Brasil, ver Dolhnikoff, 2003.

<sup>6000</sup> Para un estudio de la actuación política del clero porteño en la década 1810-1829, ver Urquiza, 1992.

<sup>6001</sup> Ver Pimenta, 2002, 81. Sobre la dudosa lealtad del Virrey Abascal a la corona, ver Peralta Ruiz, 2006.

<sup>6002</sup> Ver Pimenta, 2002, 103-125.

<sup>6003</sup> ver Díaz-Caballero, 2005, 82. Sobre la Asamblea del año XIII, ver Rosti, 1999, 39-42. Sobre el imaginario monárquico en una época de crisis o la máscara *de* Fernando VII, ver Landavazo, 2001.

<sup>6004</sup> Pimenta, 2002, 93-96. Sobre la teoría de las fronteras naturales, ver Sahlins, 1990, citado en Nogueira da Silva, 1998.

<sup>6005</sup> Sobre los poderes en disputa en el Río de la Plata (1810-1816), ver Ternavasio, 2007.

<sup>6006</sup> Ver Pimenta, 2002, 84-85.

<sup>6007</sup> ver Díaz-Caballero, 2005, 83-84.

<sup>6008</sup> Díaz-Caballero, 2005, 89. Sobre Belgrano y los Incas, ver Rosti, 1999, 43. Sobre la guerra religiosa como modelo (1809-1825), ver Demélas-Bohy, 1997. Debo este valioso dato al joven colega Alejandro Rabinovich.

<sup>6009</sup> Ternavasio, 2007, 149-150.

<sup>6010</sup> Ver Pimenta, 2002, 120-122.

<sup>6011</sup> Para el Guaraní bajo la dominación española en el Río de la Plata, ver Ganson, 2003. El fracaso del Incaismo “es el fracaso de un dispositivo que no pudo imponer de modo uniforme una obligación política de tipo tradicional solo posible en un contexto monárquico y absolutista del todo ajeno a las posibilidades de interiorización de los deberes en una sociedad fracturada y con expectativas antagónicas

---

e incluso divergentes en el seno mismo de los sectores adscriptos al monarquismo” (comunicación personal de Joaquín E. Meabe).

<sup>6012</sup> Sobre San Martín y los proyectos monárquicos en el Río de la Plata y Chile (1818-1820), ver Pérez, 1960; y Ocampo, 2007, 157, 178, 182 y 270. Sobre las candidaturas de príncipes europeos en el gobierno de Pueyrredón, ver Ocampo, 2007, 329. Sobre la segunda invasión portuguesa a la Banda Oriental, ver Pimenta, 2002, 126-152. Lamentablemente, en su magnífica obra Pimenta ignora el trabajo de Millington. Para una historia militar de Portugal, ver Gouveia Monteiro, 2003-2004.

<sup>6013</sup> Díaz-Caballero, 2005, 105. Sobre el monarquismo orleanista de Pueyrredón, ver Gallo, 1995. Sobre el separatismo Boliviano, ver Arze Quiroga, 1967; y Millington, 1996. Sobre Vicente Pazos Kanki, ver Harwood Bowman, 1975.

<sup>6014</sup> Ver Pimenta, 2002, pp. 161-162.

<sup>6015</sup> Ver Pimenta, 2002, 167; y Neves, 1995, 397-406. Sobre la Banda Oriental en la lucha de los Imperios, ver Williman y Panizza Pons, 1989.

<sup>6016</sup> Ver Pimenta, 2002, 171 y 190.

<sup>6017</sup> Ver Pimenta, 2002, 173.

<sup>6018</sup> ver Ocampo, 2003, 241. Para la índole monárquica y esclavista del imperio brasileño, ver Pimenta, 2002, 240. El propio Alvear reconocía en vísperas de la batalla de Ituzaingo que la imagen anárquica que ofrecía el modelo Rioplatense hizo que la población Riograndense, de escasa lealtad al Emperador, no materializara acogida alguna a las tropas del Ejército Republicano (Ocampo, 2003, 299).

<sup>6019</sup> Para la presencia del utilitarismo de Bentham en Buenos Aires, 1821-1824, ver Harris, 1998; y Gallo, 2001. Para el problema de la legitimidad posrevolucionaria a la luz del “motín de Tagle” (1823), ver Di Meglio, 2005. Para el trasplante de teorías jurídicas desde los centros de producción europeos, ver López Medina, 2004, 22-37. Para el movimiento de independencia del Brasil, ver Pimenta, 2002, 186-192. Para el rol de la ideología católica personificada en el clero, ver Urquiza, 1992. Para el discurso ilustrado en torno a la nación y el rol de la. Prensa (El Argos de Buenos Aires: 1821-1825), ver Myers, 2003

<sup>6020</sup> Este proceso fue analizado inicialmente por Vedia y Mitre (1930) y por Levene (1972).

<sup>6021</sup> Mandel, 1978, 130-132; y Prelooker, 1996, 53. Van Duijn (1983) y Pérez (1985) sostienen que las ondas largas de Kondratieff no se presentan antes de la segunda mitad del siglo XIX (Suter, 1995, 41).

<sup>6022</sup> para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 3.

<sup>6023</sup> ver el debate que se dió en Centroamérica a propósito de los legados Habsburgo y Borbónico, en Woodward (1996).

<sup>6024</sup> ver Guerra, 1993, 61. Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier

(1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos de la elegibilidad capitular se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

<sup>6025</sup> a diferencia del caso inglés, en donde se dió el máximo de continuidad institucional, en los casos latinoamericanos, se dió una fuerte fractura (Cotta, 1988, 276). En el caso argentino propiamente dicho, se dieron las denominadas reformas Rivadavianas, en cuyo contexto fueron abolidos los Cabildos seculares y la administración de justicia que de ellos dependía. Los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal fueron creados por Ley de 24 de Diciembre de 1821, con las mismas atribuciones de los Alcaldes llamados Ordinarios. En un ilustrativo expediente del Fuero Criminal, reza que: "...en esa época no había Alcaldes de Hermandad. Sus funciones las ejercían los Alcaldes Ordinarios en virtud de la Ley 18, título 3, libro 5, de la Recopilación de Indias; y pasaron a los que entraron a sucederlos en todas 'sus atribuciones'. No hay precepto que obligue a los Alcaldes Ordinarios a consultar sus resoluciones. Nada hay al respecto en el Título 3, Libro 5 de la Recopilación de Indias; y es otra la deducción que surge de las disposiciones contenidas en el Título 12 del mismo Libro: la 21 y 23 solo habla de la apelación en la que, confirmado por ese recurso el primer fallo la sentencia se debe hacer ejecutar por el inferior; y la 22 dice terminantemente que los Alcaldes mayores no conocen sino fuere por apelación. Otro tanto sucede con los Alcaldes de Hermandad. La Ley 4, tit. 13, libro 8 de la Recopilación prescribe que los Alcaldes de Hermandad den y ejecuten su fallo donde el delito se cometió; y en cuanto a la soltura de los aprehendidos la 8 dice '...contra quien no fuese probada culpa alguna...los absuelvan y los den por quitos. La Ley 33 tit. 12 libro 5 y hablando en general de los fallos de los inferiores en causas criminales dice '...Ordenamos que los Jueces inferiores, después de haberse apelado de sus sentencias, no puedan soltar ningún preso'. Luego cuando no se apela pueden; luego no hai consulta previa. Se vé pues, que no había consulta alguna prescrita para los fallos de los Alcaldes Ordinarios y de Hermandad.

Los prácticos empezaron entonces a introducir la doctrina de la consulta de los fallos en causa criminal, en que había reo presente o se imponía condena. No les faltaba en verdad, puntos de apoyo a la teoría. La Ley 11, tit. 22, Libro 3 introdujo la consulta al Rei cuando el Rey no se encontrase bien seguro en su opinión; y presuponiendo esa falta de segura opinión en las condenas graves la generalizó a todos esos casos, especialmente a aquellos en que el procedimiento especial de la alevosía, no dejaba el recurso de la apelación, que no pudiéndose despojar de él al encausado, había que sustituirlo por la consulta.

Había otra razón más. En los casos de pena de muerte o mutilación, las Leyes 7, 8, 10 y 14, tit. 17, Libro 2 de la Recopilación de Indias no se contentaban con el voto de uno ni aún de dos de los Alcaldes del Crimen; era necesario mayor número para que hubiese condena. Los Alcaldes del Crimen eran funcionarios más altos que los de Hermandad y Ordinarios; si uno, y aún dos votos de aquellos no bastaba para la condena, no podía aceptarse que el voto de un inferior fuera suficiente. La teoría de la consulta del fallo de libertad en causa grave se entrevé en otra fuente; y es el espíritu que claramente campea en los antiguos Códigos españoles, más preocupados de la conservación del orden político y social que de las garantías individuales.

El Reglamento de Justicia de 1817 dictado en época más adelantada solo prescribió la consulta en las condenas de presidio, azotes o destierro: falta a esa reducción la pena capital, pero siendo esto la más grave de las penas solo por una omisión de redacción ha podido suprimirse; pero esa omisión no puede suponerse a mas, porque entonces habría dicho ...samente todo fallo en materia criminal de consulta. Vino después de esta época la Acordada de 2 de Abril de 1821. Aparte del estado de anarquía y descomposición social que el país sufría entonces y que obligaba al Tribunal a adoptar medidas de seguridad; en la fecha de esa Acordada aún existían los Alcaldes Ordinarios, que, por su calidad de legos, eludían la responsabilidad de sus actos, que dejaban entera en sus letrados Asesores que ellos mismos elegían para cada caso.

Así que pronto cayeron en desuso sus disposiciones, exceptuando los casos de condena grave. Ese desuso no sólo lo acredita el Archivo de los Juzgados sino los mismos términos de la Acordada del 54 "parece que se hubiese olvidado o caído en desuso". Una Ley legislativa en parte al menos vino indirectamente a destruir en la Acordada aquello de que '...no se costeen causas sin el requisito de la consulta'.

El art. 12 de la Ley de 29 de Noviembre de 1853 dice: "...en los casos de consulta de la sentencia pronunciada los Juzgados remitirán los autos a la Excm. Cámara, sin remitir el preso, a no ordenarlo esto después". Luego la consulta presupone preso, de lo que se deduce que solo para esos casos la hay.

Las constituciones políticas vigentes se han preocupado de los derechos del individuo y de la libertad; y poco consorcio hace con estas disposiciones la prohibición de que puede poner en libertad por sí y ante sí; prescripción solo para los Jueces del Crimen, y que por no alcanzar al Correccional, al Jefe de Policía,

---

ni a los Jueces de Paz" (AGN, Tribunales, Criminales, Leg.O-2, Obisp[*o* de Aulón pide se adopten las medidas para evitar el mal que causan los que se dicen poseer la ciencia divina y saber lo pasado, presente y futuro").

<sup>6026</sup> El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas (Archivo General de la Nación, Sala IX, Tribunales, Leg. 79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás García Guilledo, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibidem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibidem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibidem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibidem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

<sup>6027</sup> Ternavasio, 1995b, 5-6.

<sup>6028</sup> ver Bodei, 1995, 387. Ultimamente, Palaver (1995) ha señalado que las críticas de Schmitt al liberalismo, que exponen los peligros posibles del individualismo moderno, no están fundadas en razones políticas sino teológicas. Ello es así, por cuanto el intento de Schmitt de sobreponerse a la tensión entre su definición de la política, como la distinción entre amigos y enemigos, y el mandamiento del Sermón de la Montaña de amar a los enemigos, revela que el individualismo moderno es --tal como lo expusieron las teorías miméticas de René Girard-- hijo de la solidaridad con la víctima propiciatoria (Palaver, 1995, 60-62).

<sup>6029</sup> ver González Echenique, 1967, 129; Romero, 1976, 112; y Cotta, 1988, 277.

<sup>6030</sup> Bartolini, 1993, 220-224.

<sup>6031</sup> En el segundo ciclo ideológico, iniciado según Rivarola (1936) en 1821, la idea de un Congreso General Constituyente estalló con la firma del Pacto Federal de 1831, que otorgó hegemonía a Buenos Aires (Rivarola, 1936, 157).

<sup>6032</sup> ver Myers, 1997.

<sup>6033</sup> Uno de los primeros en ensayar la interpretación carismática fue Jorge I. Domínguez, fundado en

---

los trabajos de David Apter sobre Ghana, ver Domínguez, 1985, 190-193.

<sup>6034</sup> el segundo ciclo ideológico se había iniciado con el pensamiento utilitarista de David Hume, Adam Smith, Jeremías Bentham y John Stuart Mill y con la idea de un Congreso General Constituyente (1821). Acerca del utilitarismo, ver Camic, 1979. Sobre el influjo del ideario absolutista de R  al de Curbant en el pensamiento pol  tico de Rosas, ver Carretero, 1970; y Sampay, 1972. Y sobre las tesis de Carretero (1970) y Sampay (1972), ver Halper  n Donghi, 1996, 127-142.

<sup>6035</sup> ver Halper  n Donghi, 1969; Carretero, 1972; y Saguier, 1983. Sobre el teatro en la primer mitad del siglo XIX, ver Urquiza Almand  z, 1972, 525; y Aspell de Yanzi Ferreira, 1993; y sobre la m  sica patri  tica, ver Garc  a Mu    z, 1989; y Buch, 1994. Sobre la vocaci  n art  stico musical de las mujeres y su origen en la exclusi  n de la pol  tica, como fu   el caso en Argentina de Mariquita S  nchez de Thompson, ver el trabajo de Isbell (1996) sobre Madame St  el. Figuras represivas como la de Rosas son homologadas en la literatura con los tipos ideales Otomanos (ver la cr  tica de Facundo, en Orta Nadal, 1961). Y sobre la guerra como factor generador de una burgues  a, ver Sloterdijk, 2003, 339-340.

<sup>6036</sup> Bernardo Berro --en su polemica con Jose M  rmol y Manuel Herrera y Obes-- cultiv   una interpretaci  n c  clica de la historia donde unas   pocas moralmente decadentes eran seguidas por otras moralmente regenerativas, una filosof  a de la excepcionalidad americana, y una concepci  n Burkeana (organicista, empirista e historicista) de la problem  tica constitucional (Myers, 1995, 62, 67 y 93; y Collini, 1987, 251). Sobre la teor  a Burkeana de la representaci  n, ver Accarino, 2003, 61-84.

<sup>6037</sup> Sobre el momento de origen, ver Candau, 2001, 92-94. Sobre las contradicciones secundarias o crisis intra-elites, ver Higley, Burton y Field (1990); y Lachmann (1990). Sobre los mitos de origen en el Rosismo, ver Salvatore, 2003, 332. Sobre la legitimidad carism  tica en Weber, ver Falco, 1999, 78-86.

<sup>6038</sup> ver Myers, 1995; y la r  plica de Myers (1996) a la cr  tica de Garavaglia. Acerca de las virtudes y los legados del cristianismo, el liberalismo y el republicanismo en el discurso pol  tico norteamericano temprano, ver Kloppenberg, 1987; sobre los patrones colectivos e individuales de lucha, los trofeos de guerra, la ritualizaci  n de la guerra y la misma guerra como acto sacrificial en la mitolog  a cl  sica griega, ver Connor, 1988; y acerca de la moral y la religi  n en la doctrina pol  tica de la Asociaci  n de Mayo, ver Mart  nez, 1939.

La mayor parte de los l  deres de la revoluci  n se nutri   de los modelos griegos y romanos que el periodismo de la   poca divulgaba profusamente, en especial el modelo de Esparta frente al de Atenas (ver Camarero, 1967; Hampe Mart  nez, 1994; Mariluz Urquijo, 1988; Pag  s, 1983; y Pailler, 1993). Por ejemplo, la noci  n de pactum societatis, vigente en la obra del Dean Funes, no provendr  a para Halper  n (1961), de la tradici  n jur  dica medieval, sino de la filosof  a y la poes  a cl  sicas (Halper  n Donghi, 1961, 92; citado en Pag  s, 1983, 64). Por el contrario, en la d  cada liberal (1820-1830) se observa un fen  meno opuesto, el rechazo del modelo romano y su sustituci  n por los modelos de la Europa Ilustrada (ver Mariluz Urquijo, 1991).

Durante las guerras civiles, los paradigmas personales del valor o mito her  ico fueron en el Litoral Pancho Ram  rez y su amante Delfina (Newton, 1969; Arce, 1963, 1971); y en Corrientes el Coronel Pl  cido Mart  nez, quien cuando ca  a herido de bala exig  a a sus correligionarios que atendieran primero a los adversarios heridos y luego a su persona (Mantilla, 1887); y en el norte Fortunata Garc  a de Garc  a, quien arriesgando su vida arrebat   de la pica la cabeza sangrante de Marco Avellaneda (Sosa de Newton, 1980); y Juan Cris  stomo Alvarez, quien fu   ejecutado por "El Peludo" Guti  rrez ignorando que Rosas ya hab  a sido derrotado en Caseros (Quesada, 1927; y Lizondo Borda, 1957). Sobre el drama novelado de la Amalia de M  rmol, ver Vi  as, 1995, 95-104.

<sup>6039</sup> Kelly, 1995; Myers, 1995, 81; Salvatore, 1996; y Urquiza, 1997.

<sup>6040</sup> Ternavasio, 1995a y 1997.

<sup>6041</sup> Myers, 1995, 98. Sobre caudillos y caudillismo, ver Riekenberg, 1991.

<sup>6042</sup> Myers, 1995, 98.

<sup>6043</sup> ver Morlino, 1988a, 103; Esposito, 2003; y Cansanello, 1994 y 1995. El pasaje de estamento y de s  bdito --propios del Antiguo R  gimen-- a clase social y ciudadano, propios de la modernidad liberal-capitalista, encuentra en la tercer contraola o reflujo regresivo l  mites u obst  culos que s  lo comienzan a

---

superarse:

a) con la transformación de dicha ola, es decir con la cuarta ola progresiva (Reformas de la llamada Organización Nacional), que dió lugar al nacimiento de nuevas instituciones (Juzgados Federales, Colegios Nacionales, Ley Láinez o de Educación Obligatoria, Ley Avellaneda o de Autonomía Universitaria, periódicos, telégrafos, ferrocarriles, Ley de Matrimonio Civil, etc.);

y b) con las guerras inter-estatales y revoluciones o guerras civiles, y sus consecuentes reformas institucionales; expresadas en las reglas que regían las relaciones entre los elementos y los procesos propios de la matriz política (Reformas Constitucionales, Leyes Codificadoras, Ley Láinez, Leyes Electorales, Ley Sáenz Peña, Reforma Universitaria, etc.). Las Leyes Electorales fueron las Leyes 140/1857, 207/1859, 75/1863, 623/1873, 759/1877, 3289/1895, 4161/1902, y 8871/1912.

<sup>6044</sup> sobre los saladeros, ver Montoya, 1971.

<sup>6045</sup> Stewart, 1993, 123; y Prelooker, 1996, 53.

<sup>6046</sup> Los puntos de contacto del Rosismo con el Antiguo Régimen se redujeron, para Ternavasio (1995), a la idea de unanimidad, la absorción en el poder ejecutivo de los demás poderes, y la noción pactista del poder (Ternavasio, 1995b, 26 y 27). Sobre la elite dirigente correntina y la invención de una tradición sanmartiniana, ver Leoni de Rosciani y Quiñones, 2001.

<sup>6047</sup> Una movilización política de los artesanos se ha constatado en Santiago de Chile entre 1820 y 1851, iniciada por una fase socialista seguida de una fase liberal, que desembocó en el motín de Abril de 1851, para mayores datos ver Romero, 1978.

<sup>6048</sup> Esta invasión encuentra sus antecedentes más remotos en las luchas por la Colonia del Sacramento durante el siglo XVIII. Para ello ver Bauzá, 1967; Bermejo de los Ríos, 1920; Tortorolo, 1925; Monteiro, 1937; Riverós Tula, 1955; y Buarque de Holanda, 1960;.

<sup>6049</sup> Desde la perspectiva de la historia militar brasilera, ver Barroso, 1935; Magalhaes, 1958; Loreto, 1953; y Sodré, 1965. Y desde el punto de vista de la historia del pueblo uruguayo, ver Ravignani y Narancio (1966); y Reyes Abadie, Bruschera y Melogno (1966).

<sup>6050</sup> ver Halperín Donghi, 1969, 1985, 163-164.

<sup>6051</sup> Piccirilli, 1958, y 1960. Sobre la invención de Uruguay, ver Verdesio, 1996.

<sup>6052</sup> Romero Carranza, et. al., 1993, II, 123.

<sup>6053</sup> ver Celesia, 1940.

<sup>6054</sup> para el impacto de los malones indígenas en el sur de Córdoba, ver Bechis, 1994.

<sup>6055</sup> Quesada, 1965; y Romero Carranza, Rodríguez Varela y Ventura, 1992, II, 255.

<sup>6056</sup> Podestá Costa, 1943, 18-19; citado en Romero Carranza, Rodríguez Varela y Ventura, 1992, II, 262; y Scavone Yegros (1990-1995).

<sup>6057</sup> versión antigua del moderno per saltum.

<sup>6058</sup> De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030.

<sup>6059</sup> Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8-III-1838, 20-27; t.23, n.588, 9-III-1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36.

<sup>6060</sup> Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971,

164-205. Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21).

<sup>6061</sup> ver el discurso de Juan Manuel de Rosas con motivo del 25 de Mayo de 1836, en Gandía, 1946, 12-13, citado en Shumway, 1993, 138. Llama la atención que Myers (1995), en su magnífico estudio, no haya reparado en este revelador documento del pensamiento político de Rosas. Acerca del pensamiento político de Rosas, ver Carretero, 1970; y Sampay, 1972. Y sobre Carretero (1970) y Sampay (1972), ver Halperín Donghi, 1996, 127-142.

<sup>6062</sup> ver Quesada, 1994.

<sup>6063</sup> El carácter vitalicio o monárquico de los caudillos o gobernadores federales se reflejó en oportunidad del Acuerdo de San Nicolás en el propio Gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza, el cual venía gobernando su provincia ininterrumpidamente desde 1841; el General Benjamín Virasoro, Gobernador de Corrientes, desde 1847; el General Celedonio Gutiérrez, Gobernador de Tucumán, desde 1841; Manuel Vicente Bustos, Gobernador de La Rioja, desde 1849; Manuel Navarro Sosa, Gobernador de Catamarca desde 1846; el General Nazario Benavídez, Gobernador de San Juan, desde 1836; el Coronel Alejo Mallea Gobernador de Mendoza desde 1847; y el General Pedro Lucero, Gobernador de San Luis, desde 1841 (Rivarola, 1908, 40). Aquellos gobernadores que no lograron perpetuarse fueron depuestos y substituídos por federales adictos a Urquiza: Pedro Segura Cubas substituyó a Manuel Navarro en Catamarca, Pedro Pascual Segura Corvalán, sobrino del Fraile Aldao, reemplazó al Coronel Alejo Mallea en Mendoza, José Benito de la Bárcena y Mendizábal substituyó en Jujuy a Francisco Borja Fernández, y en Salta el Delegado de Urquiza Bernardo de Irigoyen impuso a Tomás Arias (Cárcano, 1963, 39). El poder de Manuel López, (a) Quebracho, en Córdoba, que venía gobernando ininterrumpidamente desde 1836, amenazando con perpetuarse en su hijo José Victorio, fué derrocado por la revolución del 27 de abril de 1852, eco fiel de la batalla de Caseros, la cual impuso en el poder a Alejo Carmen Guzmán (Mota del Campillo, 1938, 378).

<sup>6064</sup> Saldías, 1892, V, 134. Ver Amaral, 1994; e Iglesia, 1996. Mientras la barraganía con plebeyas era en el Antiguo Régimen tolerada con cierta liberalidad, la barraganía con miembros de la elite fué repudiada en tiempos de Rosas con la pena de muerte. El Fuero Real imponía a la blasfemia herética la pena de muerte (Leyes 1 y 2, tit. 1, lib.IV). La novela Cornelia Bororquia, del cura trinitario apóstata Luis Gutiérrez, que bien pudo estar en la mente de quienes asesoraron a Juan Manuel de Rosas, tuvo gran circulación en Buenos Aires y fué representada teatralmente en 1817, con motivo del triunfo militar en la batalla de Chacabuco, Chile. Menéndez y Pelayo (1945) reduce el argumento de esta novela a un Arzobispo de Sevilla que "...no pudiendo expungar la pudicia de Cornelia, la condena a las llamas" (Llorente, 1870, I, 422-424; Bosch, 1910, 82; y Menéndez y Pelayo, 1948, VI, 29-30; citados por Monti, 1966, 60-71; y Urquiza Almandó, 1972, 525). Agradezco a mi colega Juan M. Méndez Avellaneda que me haya alertado sobre este pasaje.

<sup>6065</sup> Manuel Belgrano a Martín Miguel de Güemes, Tucumán, 10-VII-1817 (Güemes, 1980, 6, 264).

<sup>6066</sup> Con Felipe Antonio de Iriarte, el Marqués de Tojo, el Coronel José Antonino Fernández Cornejo, y Don José María Nadal (Güemes, 1980, 6, 41, 43, 51, 90, 407, 475).

<sup>6067</sup> para conocer las raíces políticas de este fenómeno, ver Cotta, 1988.

<sup>6068</sup> En el debate acerca de la intervención a Salta, acontecido en 1877, el Diputado Nacional Delfín Gallo manifestaba que "...cuando la tiranía de Rosas bañaba en sangre a los pueblos argentinos, la República Argentina se llamaba también República; las formas republicanas se llenaban; el Poder Ejecutivo se transmitía en períodos determinados, a pesar de que siempre era la persona de Rosas la nombrada, los cabildos hacían sonar sus campanas a fin de convocar al pueblo para que nombrara sus legisladores; existían también jueces...[pero] no Sr. Presidente, la forma republicana de gobierno de que habla la Constitución no está puesta únicamente en contraposición a la forma monárquica, es otra cosa, quiere decir: --el gobierno del pueblo; y mientras el pueblo no pueda gobernarse por medio de los mandatarios que su Constitución establece, la forma republicana de gobierno no existe en una provincia" (Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, p.90). Y al año siguiente, el Senador Nacional Dalmacio Vélez Sársfield,

---

en el debate acerca de la intervención a Corrientes, manifestaba en el Senado de la Nación que "...Durante la sangrienta tiranía de Rosas, existían en la República las formas de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿y quién se atreverá, señor Presidente, a decir que aquello era una República?" (Senador Vélez Sársfield, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.160).

<sup>6069</sup> Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

<sup>6070</sup> Para los recuerdos de una víctima de la mazorca (1839-1840), ver Somellera, 2001.

<sup>6071</sup> De los treinta vecinos de Salta que acceden a la gobernación, mencionados en la Tabla SAL-II, no todos pertenecen a la oligarquía salteña. Entre los que sí pertenecieron, cuatro lo fueron de la familia de los Saravia; dos del clan de los Tamayo; y tres de la familia de los Uriburu, esta última una de las pocas familias oligárquicas de Salta que en la segunda mitad del siglo pasado pasaron a integrar la oligarquía central. Respecto a los primeros, José María Saravia y Jáuregui gobernó en 1832, su hermano Manuel Antonio fue impuesto por su cuñado el caudillo Juan Felipe Ibarra en 1844 (Alén Lascano, 1968, 161), y su otro hermano José Manuel Saravia y Jáuregui, gobernó en 1846 (Bazán, 1986, 384; Taboada, 1933, 30-32; y Cornejo, 1983, 193). Con respecto a los últimos, el Coronel Evaristo Uriburu y Hoyos gobernó en 1831, 1837, y 1845; su hermano Vicente en 1831; su otro hermano Pedro en 1850; y finalmente, su hermano menor Juan Nepomuceno gobernó entre 1861 y 1864. Los Uriburu estaban muy íntimamente vinculados entre sí y con las familias de los Hoyos y los Arenales, al extremo de constituirse en primos dobles, así como enemistada con la de los Saravia. En su primera generación argentina los Uriburu se casaron en dos oportunidades con los Arenales y los Hoyos. El Coronel Evaristo Uriburu y Hoyos se hallaba casado con María Josefa Arenales y Hoyos, y Don Camilo Uriburu y Hoyos con Delfina Uriburu de la Maza (Cuadro S-I). En su segunda generación, de 34 matrimonios celebrados cinco de ellos (o el 15%) lo fueron entre primos hermanos. El Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", se casó en 1851 con Serafina Uriburu Arenales, y Virginia Uriburu Cabero se casó con el que fuera Presidente de la República José Evaristo Uriburu Arenales (Cuadros S-II y S-III). Asimismo, Federico Uriburu Avila se casó en 1864 con Julia Uriburu Arenales, y Mercedes Uriburu Arias se casó en 1860 con Juan de Navea Uriburu (Cuadro S-IV y S-V). Finalmente, Dolores Uriburu Castro se casó en 1864 con el que fuera Ministro de Hacienda de la Nación Francisco Uriburu Patrón (Cuadros S-VI y S-VII). También en Salta, el Gobernador Delegado Manuel Antonio Saravia, (a) "Guacelencia", denunciaba a Juan Felipe Ibarra que el Dr. Celedonio de la Cuesta había atacado a José Antonio de Zavalia "...levantando atróz calumnia de ser salvaje unitario, por poner en consternación y menosprecio a la familia federal e influyente a que pertenece" (Figuerola, 1942, 187).

<sup>6072</sup> José Antonio Durán a Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, 14-VII-1849 (AGN, Sala VII, 3-1-6, fs.95).

<sup>6073</sup> Terán, 1939, 452; Gallo, 1941, 11-12; y Bazán, 1986, 385.

<sup>6074</sup> Romero Carranza, Rodríguez Varela, y Ventura, 1992, II, 76-80.

<sup>6075</sup> Para el impacto que las polémicas periodísticas desatadas en el exilio tuvieron sobre el poder político dictatorial, ver Varela (s/f); Facchinetti de Alvarez (1969/71); y Páez de la Torre, 1980-81. Sobre la utilización política de la litografía en tiempos de Rosas, ver Halperín Donghi, 1996, 62. A propósito, ver el trágico fin que tuvo en Buenos Aires en tiempos de Rosas el litógrafo francés Hipólito Bacle (Trostiné, 1953). Para la relación del periodismo y la esfera pública en este mismo período en Francia, ver Reddy, 1994.

<sup>6076</sup> Morgenthau, 1992, 244.

<sup>6077</sup> Para Florencio Varela, los pactos existentes en esta época no pasaban de una liga entre cuatro provincias del Litoral, y no podían bajo pretexto alguno ser consideradas un pacto de unión federativa entre todas las provincias que formaron la República Argentina (Varela, s/f, 152.).

<sup>6078</sup> De María, 1883-1887; Moreno, 1925; Herrera, 1941; Fonseca, 1946; y Magariños de Mello, 1952.

<sup>6079</sup> Chiaramonte, 1989, 54.

<sup>6080</sup> Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990, 84.

- 
- <sup>6081</sup> Ver Gerbi, 1960, capítulo III.
- <sup>6082</sup> Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990, 85.
- <sup>6083</sup> Izard, 1992, 154; y Guerra, 1992, 1993, 116.
- <sup>6084</sup> Chiaramonte, *La Ilustración en el Río de la Plata*, p.59.
- <sup>6085</sup> Doctores Miguel Gregorio Zamalloa, Domingo Paz y Echevarría, Tomás Antonio Valle, Mariano Pérez de Saravia, Fernando Pérez de Bulnes, Mariano Irigoyen, Nicolás Pombo de Otero, Juan José Castelli, Manuel José de Albarden, Mariano Zavaleta, Miguel García de la Huerta, José Francisco de Acosta, Antonio Ezquerrene y Pacheco de Malaver, Francisco Bruno de Rivarola, José Vicente Carrancio, Francisco de los Ángeles Muñóz, Manuel Rodríguez de la Vega, Mariano Moreno, Mariano Andrade, Ambrosio y Gregorio Funes, José Conty, José Simón García de Cossio, Matías Oliden, Agustín Pío de Elia, José Pacheco Gómez, Juan Luis de Aguirre y Tejeda, Juan José Segovia, Facundo Prieto y Pulido y Manuel Genaro de Villota, entre muchos otros.
- <sup>6086</sup> Wedovoy, 1955.
- <sup>6087</sup> AGN, Sucesiones, Leg.8418, fs.49-52.
- <sup>6088</sup> Caraffa, 194; Caillet-Bois, 1938-39 ; Levene, 1950, 172-177; y Lewin, 1960, 9-57.
- <sup>6089</sup> Padre de Juan Bautista Alberdi.
- <sup>6090</sup> AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9.
- <sup>6091</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1.
- <sup>6092</sup> AGN, Hacienda, Leg.71, exp.1892; Leg.84, exp.2174; Leg.111, exp.2860; Leg.112, exp.2888; y Leg.141, exp.3620; y Tribunales, Leg.119, exp.28; y Leg.234, exp.26.
- <sup>6093</sup> Saguier, 1992.
- <sup>6094</sup> Saguier, 1990.
- <sup>6095</sup> Saguier, 1991 y 1992.
- <sup>6096</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, exp.3, folio 24.
- <sup>6097</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, exp.19, folio 33v.
- <sup>6098</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, exp.32, citado en Saguier, 1992.
- <sup>6099</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, exp.7.
- <sup>6100</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.2, Fol.6-14v.; y Leg.99, exp.8.
- <sup>6101</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.191, exp.6, folios 73-87.
- <sup>6102</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.157, exp.3, folios 75-82; y Leg.228, exp.16, folios 26-34.
- <sup>6103</sup> Para el modernismo tardío y las formas de sociabilidad política en la provincia de Venezuela, ver Leal Curiel, 1998.
- <sup>6104</sup> Sobre la frecuencia de las tertulias, ver Guerra, 1993, 93-94. Sobre las referencias al Antiguo Testamento, ver Guerra, 2002. Y sobre sermones y catecismos políticos, ver Irurozqui, 2002, 219-250. En esa materia, Irurozqui omite la persona del jesuita expulso Lacunza, y la de sus discípulos

---

estudiantes de la Universidad de Charcas, algunos de los cuales dejaron éditos evangelios patrióticos (ver Ricci, 1923; y Ramos Mexía, 1820). Sobre el Lacuncismo, el neoescolasticismo y el utilitarismo en Manuel Belgrano y Francisco Hermógenes Ramos Mexía, ver Piora, 2002, 232-340. Sobre el incaísmo como primera ficción orientadora en la formación de la nación criolla en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ver Díaz Caballero.

<sup>6105</sup> Halperín Donghi (1982, 1995) en **Una nación para el desierto argentino**, cuando hace referencia a Bartolomé Mitre y su rol en la Generación de 1837 omite mencionar el aporte interpretativo de Mitre sobre el rol del mito étnico en la revolución independentista, volcada en su obra sobre Belgrano y la Emancipación Americana (ver Halperín Donghi, 1995, 28).

<sup>6106</sup> Con relacion a la desintegracion politica en la America del Sur y el separatismo Boliviano, ver Arze Quiroga, 1967. Sobre el separatismo Paraguay, ver Prieto, 1946. Sobre el separatismo Oriental, ver Real de Azua, 1985; y Moraes, 1997. Sobre ejes socio-espaciales y regionalismo en el Uruguay, ver Jackson, 1990. Para el nacimiento de las provincias, ver Pimenta, 2002, 120-122

<sup>6107</sup> Para el estudio de la influencia guaraní en la formación de la sociedad uruguaya, ver González Rissotto y Rodríguez Varese, 1994. Con referencia a la lengua y su reflejo en la realidad socio-cultural salteña, ver Torino, 1982. Acerca del léxico de procedencia quechua en el habla de Salta (Noroeste argentino), ver Fernández Lavaque, 1996. Sobre el guaraní correntino, ver Ayala Gauna, 1963/64. Sobre el contacto de tres lenguas (guaraní, criollo y castellano) estudiado en un grupo mbaya en Corrientes, ver Dietrich, 1994. Acerca del quechua Santiagueño, ver Bravo, 1956; Corvalán, 1956; y Christensen, 1970. Sobre el quichua de Catamarca, la Rioja y el Noroeste argentino, ver Nardi, 1962; y Granda, 1993. Sobre la fijación del Quechua en el Tucumán histórico, ver Ledesma Medina, 1958. Para el guaraní bajo la dominación española en el Río de la Plata, ver Ganson, 2003.

<sup>6108</sup> [ver Weinberg, 1996, 369. Sobre la transición de las colecciones y repositorios reales a los públicos, ver Crow, 1985. Sobre los Museos de Ciencias Naturales como catedrales de ciencia, ver Sheets-Pyenson, 1988. Con referencia al desarrollo de los servicios bibliotecarios en la Argentina en el siglo XIX, ver Sabor Riera, 1974.](#)

<sup>6109</sup> [A proposito de Florencio Varela y la generacion de 1837 en Argentina, ver Facchinetti de Alvarez, 1969/71. Para el pensamiento de la generacion argentina de 1837, ver Nascimbene, 1981; Halperín Donghi, 1982; y Ktra, 1996. Para el pensamiento de Bernardo Berro y los componentes cristianos y republicanos de la imagen Rosista del orden, ver Myers, 1995.](#) Sobre formas de identidad política y representaciones de la Nación en el discurso de la generación de 1837, ver Wasserman, 1998. Sobre la relación entre historia i literatura en El Matadero de Echeverría, ver Fiorucci, 2005.

<sup>6110</sup> [ver Weinberg, 1996, 391-392. Sobre los procesos de secularización en las actividades educativas, ver Tedesco, 1982; y Martínez Blanco, 1999. Sobre los laboratorios experimentales en la genesis de la cultura científica Rioplatense, ver Prego, 1998.](#)

<sup>6111</sup> Sobre los prejuicios racistas en las obras de Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge y Manuel Ugarte, ver Ricaurte Soler, 1969; Terán, 1987; y Svampa, 1994, 116. [Sobre las dos políticas indigenistas del Presidente Avellaneda y su época \(antropología cristiana y evolucionismo darwinista\), ver Levaggi, 1996. Sobre las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina \(Siglos XVI-XIX\), ver Levaggi, 2000. Con referencia a la erosión étnica de la población de color en Argentina durante el siglo XIX, ver Andrews, 1980.](#)

<sup>6112</sup> [Sobre los Misioneros franciscanos en el Chaco occidental: visiones, acciones y contradicciones, 1861-1914, ver Navarro i Barba, 1998. Sobre Los franciscanos de Río IV, los indios ranqueles y otros temas de la vida en la frontera, ver Martini de Vatausky, 1981. Sobre los salesianos en la Argentina, 1874-1885, ver Entraigas, 1969-1972. Sobre la historia de las misiones salesianas en La Pampa, República Argentina, ver Massa, 1968.](#)

- 
- <sup>6113</sup> [El debate entre Schelling y Fichte sobre la función de las universidades se centró en la necesaria relación entre la jurisprudencia y la filosofía de la historia, así como entre la medicina y la filosofía de la naturaleza \(Habermas, 1987, 336\): Sobre la opción de Humboldt entre Schleiermacher y Fichte, ver Villavicencio y Vermeren, 2001, 173.](#)
- <sup>6114</sup> Sobre la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en Buenos Aires a fines del Siglo XIX, ver Malosetti Costa, 2001. Sobre el debate entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre acerca de la naturaleza debida en la historiografía nacional, ver Madero, 2001. Sobre la voz como forma de un destino nacional en el Martín Fierro, ver Dorra, 1997. Sobre las tradiciones en pugna en la canonización estatal del Martín Fierro (1870-1940), ver Cattaruzza y Eujanian, 2002.
- <sup>6115</sup> [Sobre el Museo Bernardino Rivadavia, institución fundante de las ciencias naturales en la Argentina del siglo XIX, ver Sauro, 2000. Sobre la medicina científica y la salud pública en América Latina durante el siglo XIX, ver Quevedo y Gutiérrez, 1996. Sobre el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ver Sheets-Pyenson, 1988; y Teruggi, 1994. Sobre la enseñanza del álgebra y la geometría en el Buenos Aires del siglo XIX, ver Santalo, 1970. Sobre el refinamiento del vacuno y la vanguardia terrateniente bonaerense \(1856-1900\), ver Sesto, 1999. Sobre la organización de la enseñanza de la ciencia en la universidad argentina y el rol que le cupo a Juan María Gutiérrez; ver Myers, 1994. Sobre la enseñanza de la minería en la Argentina en el siglo XIX, 1862-1906, ver Auza, 1991. Y acerca de los rectorados y las cátedras de los Colegios Nacionales como espacios de lucha facciosa en las provincias Argentinas del siglo XIX, ver Saguier, 1996-97. Sobre nacionalismo y liberalismo económico en Argentina 1860-1880, ver Chiaramonte, 1982.](#)
- <sup>6116</sup> [Sobre Ilustración y radicalización ideológica en el Consulado de Buenos Aires \(1755-1810\), ver Navarro Floria, 1989. Para el estudio preliminar al Nuevo Aspecto del Comercio en el Río de la Plata de Manuel José de Labardén, ver Wedovoy, 1955. Para el estudio de la influencia del Padre Feijóo en las ideas ilustradas de Manuel José de Labardén en el Río de la Plata, ver Olaso, 1979.](#)
- <sup>6117</sup> [El disenso religioso puede ser confrontado en estudios como el de Duffy \(1982\) sobre católicos y disenso en la Inglaterra dieciochesca; como el de Heinz \(1993\) sobre el disenso religioso de los Adventistas en Austria, 1890-1975; el de Sim y Walker \(2000\) sobre la retórica del disenso y la crisis de legitimación en la Inglaterra Isabelina; el de Cowherd \(1959\) sobre los aspectos religiosos de los movimientos liberales y de reforma humanitaria en Inglaterra desde 1815 a 1848; y el de Kiraly \(1975\) sobre tolerancia y movimientos de disenso religioso en Europa Oriental. Sobre Jules Ferry, el autor de la legislación laica en Francia, ver Furet, 1985; y Gaillard, 1989.](#)
- <sup>6118</sup> [En la América Latina, la lengua francesa había desplazado a las lenguas ibéricas \(española y portuguesa\) de la hegemonía académica. Sobre el rol de la tradición historiográfica Mitrista en la invención de la nación Argentina, ver Shumway, 1993; y Nascimbene, 2002, capítulo 4. Para una comparación con la construcción de mitos patrióticos en el Perú, ver Millones Mariñez, 2006; y en El Salvador, ver López Bernal, 2000. Para la construcción espectacular de la memoria nacional, ver González Stephan, 2006. Sobre la alta sociedad, el mundo de la cultura y la modernización en la Buenos Aires del cambio del siglo XIX al XX, ver Losada, 2006.](#)
- <sup>6119</sup> [Sobre la iconografía histórica Rioplatense y el pintor Juan Manuel Blanes, ver Peluffo, 1993; y Amigo, 1994. Para una cartografía física y política de la Argentina, 1838-1882, ver González Bollo, 1998. Para la construcción del culto al Libertador Simón Bolívar en la Venezuela del dictador Guzmán Blanco, ver Martínez, 2006; y Carrera Damsa, 2005 y 2006. Para la invención de Francisco Morazán como héroes nacional en El Salvador \(1858-1930\), ver López Bernal, 2000. Para unas reflexiones sobre un héroe patrio peruano, el Mariscal Cáceres, ver Millones Mariñez, 2006.](#)
- <sup>6120</sup> [Con referencia a los conflictos entre católicos y liberales en la generación del ochenta en Argentina, ver Auza, 1975. El ateísmo latinoamericano puede ser confrontado con estudios como los de Henkys y Schweitzer \(1997\), sobre ateísmo, religión e indiferencia en las dos mitades de Alemania antes y después de 1989; el de Gould \(1998\) sobre Bonhoeffer y el falso dilema del ateísmo alemán; el de Agadjanian \(2000\) sobre minorías religiosas durante la transición de Rusia del ateísmo al secularismo; y el de Levkievskaja \(2000\) sobre el ateísmo militante soviético a través de los ojos de un campesino](#)

---

ruso

- <sup>6121</sup> Sobre Gobineau y los neo-gobinianos, ver Herman, 1997, ch.2. Sobre el determinismo étnico-biológico de Gobineau y de Haeckel, ver Herman, 1998, 73-76; y Traverso, 2003, capítulo IV.
- <sup>6122</sup> [ver Tedesco, 1982, 142. Mientras se remitía desde Buenos Aires crecientes insumos a las provincias para construcción de escuelas y pago de haberes a los docentes, por medio de la Ley de Subvenciones de 1871, la Iglesia Católica siguió controlando mediante la Compañía de Jesús gran parte de la educación secundaria o media \(Colegio del Salvador en Buenos Aires, y de la Inmaculada Concepción en Santa Fé\).](#)
- <sup>6123</sup> [.Sobre la generación del 80 y la legislación requerida por el país, ver Marienhoff, 1981. Con relación al pensamiento político liberal argentino \(1880-1920\), ver Roldan, 1993.](#)
- <sup>6124</sup> [ver Pyenson, 1984; y Halperín Donghi, 2002, 73. Sobre Sarmiento, Benjamín Apthorp Gould y la fundación del Observatorio Astronómico en Córdoba \(Argentina\), ver Hodge, 1971; y Monserrat, 1977. Sobre el presidente Nicolás Avellaneda y el retraso y competencia de la astronomía argentina respecto de la de Chile en el estudio del sistema solar desde el cielo austral, ver Chaudet, 1926. Sobre el aporte de los científicos alemanes \(Lehmann-Nietzsche, Weiser, Uhle, Menghin\) a la antropología Argentina, ver Arenas, 1989-90 y 1991. Sobre la difusión de la química alemana en la docencia argentina \(1906-1915\), ver Ferrari, 1997. Sobre los físicos alemanes a principios del siglo XX en Argentina, ver Andriní y von Reichenbach, 2002. Sobre la influencia de Lamprecht y Seignobos en la Nueva Escuela Histórica de Argentina \(Levene, Ravignani y Molinari\), ver Pagano, y Galante, 1993; y Eujanian, 1995.](#)
- <sup>6125</sup> [ver Saguier, 1998, 315-316; y Saguier, 1996/97, 140.](#)
- <sup>6126</sup> Instituciones tales como el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) en 1892; la Junta de Historia y Numismática en 1893 (luego Academia Nacional de la Historia), la Facultad de Filosofía y Letras y su Museo Etnográfico, inaugurados en 1896 y 1904 respectivamente, y el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria fundado en 1904. Sobre el Museo Etnográfico y sus protagonistas, ver Perazzi, 2003.
- <sup>6127</sup> Sobre la colegialidad profesional en Europa, ver Johnson, 1972.
- <sup>6128</sup> Freidson, 1994, párrafo 21.
- <sup>6129</sup> Sobre dinastías y linajes de médicos argentinos, ver Buzzi, 1997.
- <sup>6130</sup> Sobre el fútbol y los medios masivos en la década del 20 en Buenos Aires, ver Karush, 2003. Fútbol y Patria: Para la crisis de la representación de lo nacional en el fútbol argentino, ver Alabarces y Rodríguez, 1997.
- <sup>6131</sup> Sobre los Rectorados y las cátedras de los Colegios Nacionales como espacio de lucha facciosa, ver Saguier, 1996-97. Sobre el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras, ver Arenas, 1989-90. Para la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, ver Buchbinder, 1997. Sobre la fundación de la Escuela Superior de Guerra, ver Rouquié, 1981, 93. Sobre la transformación de la prensa escrita en Argentina a través del diario La Nación, ver Sidicaro, 1993. Sobre elecciones, oposición política y prensa escrita a comienzos del siglo XX en Argentina, ver Zimmermann, 1997a. Sobre el diario El Pueblo y la realidad socio-cultural de la Argentina a principios del siglo XX, ver Ruschi, 1988. Acerca del diario Crítica y Natalio Botana en la década del 20, ver Saitta, 1998. Para una historia de grandes diarios, revistas y periodistas argentinos, ver Ulanovsky, 1997. Con referencia al club Boca Juniors (Buenos Aires), ver Speroni, 1967.
- <sup>6132</sup> Para el tango en sus etapas de música prohibida, ver García Jiménez, 1965. Sobre el origen prostibulario del tango en la sociedad Rioplatense, 1880-1920, ver Lamas y Binda, 1998. Sobre la

---

gestación de la música ciudadana (tango) como espectáculo de una tensión social erotizada, ver Mafud, 1966; Canton, 1968 y 1972; Pampin, 1976-77; Matamoro, 1982; Collier, 1986; Azzi, 1991; y Savigliano, 1995. Sobre arte y sociedad en Buenos Aires a fines del Siglo XIX, ver Malosetti Costa, 2001. Para una enciclopedia interactiva sobre el tango en CD-ROM, ver Estayno, 1996. Acerca del tango como espectáculo revelador de la estructura de clases y nacionalidades, ver Savigliano, 1993-94. Sobre la historia del Teatro Colón (Buenos Aires), 1908-1969, ver Caamaño, 1969. Sobre la actividad de la Sociedad Nacional de Música entre 1915 y 1930, ver García Muñoz, 1988. Sobre el teatro gauchesco rioplatense y el teatro revolucionario mexicano, ver González Padilla, 1965. Sobre la situación del teatro gauchesco en la historia del teatro argentino, ver Sánchez Garrido, 1961. Sobre el realismo social en la industria cinematográfica latinoamericana (décadas de 1930 - 40 y 50), ver Oroz, 1993.

<sup>6133</sup> ver Escudé, 1990.

<sup>6134</sup> ver Tedesco, 1982, 48-51; y Tiramonti y Suasnábar, 2002, 1.

<sup>6135</sup> ver Buchwinder, 1997, 33. Este debate se extendió más luego al rol de las Facultades de Derecho como proveedoras de abogados, y de las Facultades de Medicina como fabricantes de médicos, ver Colmo, 1915; Cossio, 1945; y Giudici, 1959. Sobre la alta sociedad, el mundo de la cultura y la modernización en la Buenos Aires del cambio del siglo XIX al XX, ver Losada, 2006.

<sup>6136</sup> Sobre los Krausistas argentinos, ver Roig, 1969.

<sup>6137</sup> Para un examen de la discursividad yrigoyenista y en especial su apostolado reparador, ver Padoan, 2002, capítulo III.

<sup>6138</sup> De María, 1883-1887; Moreno, 1925; Herrera, 1941; Fonseca, 1946; y Magariños de Mello, 1952.

<sup>6139</sup> Bartolini, 1993, 222.

<sup>6140</sup> Bartolini, 1993, 222.

<sup>6141</sup> para estudiar el caso del auge y declinación del poder regional, ver Palacio, 1983; y Waldow, 1994.

<sup>6142</sup> ver Guerra y Lempérière, 1998, 114.

<sup>6143</sup> ver Vives (1986).

<sup>6144</sup> Para el Guaraní bajo la dominación española en el Río de la Plata, ver Ganson, 2003.

<sup>6145</sup> ver Ternavasio, 2002, 59.

<sup>6146</sup> ver Vives (1986).

<sup>6147</sup> ver Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991). Sobre el intento de convertir a Goya, de villa en ciudad, ver Buchbinder, 2004, 62.

<sup>6148</sup> En Cuyo, y más precisamente en San Juan, la acción del gobierno contra toda tentativa opositora "...se ejerce por medio del agua. Tal como suena. Es sabido que el suelo de San Juan, extremadamente seco, solo ha podido hacerse productivo por medio de obras de irrigación, que en una complicada red de canales abarcan toda la provincia. Como el agua no abunda, cada propietario tiene derecho a una cantidad determinada y paga por el servicio una cuota proporcional. Esta distribución de lo que allí es un elemento esencial de vida y de riqueza está a cargo de juntas electivas a razón de una minuciosidad y exactitud verdaderamente matemática, para que la irrigación alcance a toda la provincia. En tales condiciones se comprende el formidable recurso que el gobierno tiene en sus manos para acallar toda resistencia. Aunque las Juntas administrativas son electivas, la influencia oficial tiene en su formación un poder decisivo, porque el sufragio es en todas sus manifestaciones una simple parodia. De este modo el gobierno viene a tener en su mano la distribución del agua, es decir, la fortuna o la ruina de los particulares. Cuando un opositor molesta, se le cierra el canal en sus

---

campos. Si no los tiene y se opera sobre algún pariente más o menos próximo. Es una espada de Damocles suspendida sobre todos los propietarios. Por estos apuntes puede darse cuenta el lector de la relación que median entre el gobierno y la población de San Juan. Es así, con esta arma incontrastable que los círculos dominantes se han perpetuado más de veinte años en el poder, sofocando en gérmen toda tentativa de resistencia y manteniendo la disyuntiva de la sumisión o de la ruina a todos los elementos de arraigo de la provincia. Pero hay todavía otros recursos: el aumento de las cuotas de impuestos, las multas por la falta de conservación de los canales, las contribuciones de brazos para las obras de irrigación. Todos estos medios se emplean sin disimulos ni ocultaciones, obrando con la tranquila despreocupación del que explota un feudo propio ("La Situación de San Juan, El gobierno del agua. La Nación, Jueves 9-I-1902). Acerca de los cambios en la administración del agua de riego en Cuyo, ver Supplee, 1988, y 1993; y sobre el denominado torniquete del agua, ver Rodríguez, 1979; y Lacoste, 1994, 60.

<sup>6149</sup> Para el caso argentino, ver Peña, 1945; Ortiz, 1946, y 1955, parte II, Cap.III y parte III, Cap.VI; Wright, 1974; y López del Amo, 1990. Para el caso de Colombia, ver Park, 1986, 460-464.

<sup>6150</sup> hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de su prima Mercedes Aráoz Figueroa; y sobrino del Gobernador Cnel. Alejandro Figueroa.

<sup>6151</sup> Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 14-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6152</sup> Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 17-X-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

<sup>6153</sup> E. M. Gallo a V. de la Plaza, Salta, 24-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>6154</sup> Félix M. Saravia a V. de la Plaza, Salta, 1-XI-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

<sup>6155</sup> Miguel Juárez Celman a J. Roca, 1887 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>6156</sup> Miguel Juárez Celman a J. Roca, 1887 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>6157</sup> conuñado del Diputado Nacional Julián Murga.

<sup>6158</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6159</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6160</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6161</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6162</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6163</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6164</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6165</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6166</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6167</sup> Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>6168</sup> Zaggarri, 1988, 1252.

<sup>6169</sup> Mignanego, 1938, 8.

---

<sup>6170</sup> ver Urquiza Almandoz, 1965, II, parte IV, cap.6, 397-403; III, cap.20, 25-36; y III, cap.41, 271-280. Según la oposición a Racedo, el cambio obedecía a la necesidad de vigilar a Santa Fé, cuya situación bajo el control de Simón de Iriondo no era Roquista (Rato de Sambucetti, 1980, 423). En realidad, la hegemonía de Paraná era un retorno a los tiempos en que gobernaba Pascual Echagüe, aliado de Rosas; y a la época en que fué la capital de la Confederación Argentina (Halperín Donghi, 1985b, 30).

<sup>6171</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, p.557.

<sup>6172</sup> E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 21-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6173</sup> E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 21-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6174</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 24-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6175</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 24-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6176</sup> Juan A. Mantero a J. Roca, 15-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6177</sup> Juan A. Mantero a J. Roca, Uruguay, Entre Ríos, 4-IX-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

<sup>6178</sup> A. Cardassy a J. Roca, Paysandú, 25-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6179</sup> Debo este valioso dato a la gentileza de mi correligionario Entrerriano Carlos Moreno.

<sup>6180</sup> también se daban estas disputas en la provincia de La Rioja, entre las ciudades de La Rioja y Chilecito; en la provincia de Corrientes, entre las ciudades de Goya y Corrientes; en la provincia de Córdoba, entre las ciudades de Río Cuarto y Córdoba; en la provincia de San Luis, entre las ciudades de Villa Mercedes y San Luis; y en la provincia de Catamarca, entre los Departamentos del Oeste y los del Este.

<sup>6181</sup> Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 14-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39.

<sup>6182</sup> Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López a Juárez Celman, Rosario, 4-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

<sup>6183</sup> hijo de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno, casó cuatro veces, la primera con Clara Cabot, la segunda con Sofia Maurer, la tercera con Ana Sieber, y la cuarta con Dominga Cullen Iturraspe, viuda de Emilio Cabal y Gonsález (Calvo, II, 36).

<sup>6184</sup> Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>6185</sup> Nacido en Buenos Aires en 1852, hijo de Juan Lorenzo Cafferata y de Francisca Silveyra, y casado con Adela Garzón (Cutolo, I, 41). Fué padre del Diputado Nacional Juan F. Cafferata Garzón.

<sup>6186</sup> Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>6187</sup> J. B. Iturraspe a Luis A. Sauze, Santa Fé, 9-XII-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>6188</sup> J. B. Iturraspe a Julio A. Roca, Santa Fé, 8-I-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

<sup>6189</sup> Sobre la tierra y el poder en una oligarquía argentina, la salteña, ver Hoops, 1990.

<sup>6190</sup> Coni, 1927, 128.

<sup>6191</sup> Para el impacto de las reformas borbónicas vistas desde la frontera, ver Ortelli, 2005.

<sup>6192</sup> Mitre, 1889, 152.

---

<sup>6193</sup> Ibíd.

<sup>6194</sup> Ibíd.

<sup>6195</sup> Harris, 1969, 49-59; Huntington, 1968, 374-396; y Jaffé, 1960, 337-354.

<sup>6196</sup> Ingenieros, 1918, 376.

<sup>6197</sup> Antola, 1919, 107.

<sup>6198</sup> Frigerio, 1953, 25; y Palcos, 1960, 153-154. Sobre marginalismo y relaciones interétnicas: blancos e indios en la frontera rioplatense en el siglo XIX, ver Ortelli, 2000.

<sup>6199</sup> González, 1957, 177.

<sup>6200</sup> Lynch, 1958, 166.

<sup>6201</sup> Sala de Touron et. al., 1968, 83.

<sup>6202</sup> Lynch, 1958, 167.

<sup>6203</sup> El decreto revolucionario de 1812 consistió en distribuir la tierra pública a viudas y gente pobre que luchó por la independencia. Mientras en la banda occidental del Río de la Plata esta ley cayó en letra muerta, en la banda oriental, la mayor fuente de cueros durante el siglo XVIII, debido a la mayor presión de población, a la inexistencia de tierra libre y a una distribución injusta de territorio, se desencadenó en 1815 un proceso radical al más puro estilo reformista burgués. Este proceso consistió en confiscar la tierra de los propietarios españoles y de Buenos Aires y distribuirla en pequeños lotes de una legua cuadrada cada uno, entre miles de campesinos y soldados. Este proceso fue inmediatamente frustrado por la toma de mando portuguesa (Barrán, 1964; Torre, 1969; y Halperín, 1972, 306).

<sup>6204</sup> Montoya, 1971.

<sup>6205</sup> Coni, 1927, 138.

<sup>6206</sup> Watkins, 1967, 58.

<sup>6207</sup> Coni, 1927, 30 y 39.

<sup>6208</sup> Ramos Mejía, 1907, 158.

<sup>6209</sup> La superficie total transferida puede ser determinada substrayendo de la cantidad total de transferencias, aquellas parcelas que habían sido transferidas en dos o más oportunidades. De acuerdo al Cuadro 8, como sólo 15 rotaciones entre 119 rotaciones se distribuyeron con parcelas previamente transferidas de manera semejante, en otras palabras, transferidas en dos oportunidades, cubriendo una superficie de 102 leguas cuadradas, encontramos que sólo 104 derechos enfiteúticos consistieron en parcelas transferidas en sólo una oportunidad, cubriendo una superficie de 768 leguas cuadradas. En el siguiente período (1834-1838) estas tierras nuevas experimentaron nuevas rotaciones, totalizando 55 transacciones en 462 leguas cuadradas.

<sup>6210</sup> Halperín Donghi, 1968, 58.

<sup>6211</sup> Bagú, 1966.

<sup>6212</sup> Halperín Donghi, 1972, 194.

<sup>6213</sup> Reber, 1979, 17.

<sup>6214</sup> Giberti, 1966, 131.

---

<sup>6215</sup> Brown, 1978, 172.

<sup>6216</sup> Registro Oficial, 1836, 41.

<sup>6217</sup> Giberti, 1966, 131; y Halperín Donghi, 1982, 219.

<sup>6218</sup> Burgin, 1946, 253.

<sup>6219</sup> Broide, 1951, 179.

<sup>6220</sup> Archivo General de La Nación (AGN), Protocolos del año 1836, Registro 1, f. 460v.; Reg. 2, f. 217; Reg. 4, fs. 64v., 144v. y 197v.; Reg. 6, fs. 32, 145, 263, 265v. y 372.

<sup>6221</sup> AGN, Protocolos, Reg. 4, año 1836, fs. 124.

<sup>6222</sup> AGN, Protocolos, Reg. 6, año 1836, fs. 12, 298 y 341.

<sup>6223</sup> Burgin, 1946, 200 y 254.

<sup>6224</sup> Randall, 1977, 59.

<sup>6225</sup> Mabragaña, 1910, 396.

<sup>6226</sup> Randall, 1977, 49.

<sup>6227</sup> Algunos autores consideran que la incontrolada emisión de vales de tierras en la provincia de Buenos Aires a fines de la década de 1830 fue la causa de la caída en los valores de la tierra (Carretero, 1972, 28). Al asumir esto, confunden las causas reales de la caída en los valores de la tierra. Esta relación causa-efecto es falsa porque confunde el mercado de tierras con el mercado de vales de tierra. Los vales de tierras pudieron haberse depreciado sin arrastrar la devaluación de la tierra. Al adoptar esta falsa vinculación confunden las causas reales detrás de la caída de los valores de la tierra, que fueron esencialmente el creciente abastecimiento de tierras a través de las ventas públicas y la extrema escasez de lingotes generada por el bloqueo marítimo europeo.

<sup>6228</sup> El partido unitario busca la destrucción de las autonomías provinciales a fin de modernizar el campo e incorporarlo más rápidamente al mercado mundial capitalista. Mientras que los propietarios de tierra federales se asociaban directa y firmemente con los procesos de manufactura de la carne salada, el terrateniente unitario, por causa de razones estructurales, tenía que depender de intermediarios o agentes para vender al por mayor sus productos o, de lo contrario, repartirlos en los corrales públicos.

<sup>6229</sup> El partido federal aspiraba a perpetuar las autonomías provinciales a fin de beneficiar las respectivas oligarquías provinciales en su objetivo de preservar el statu quo.

<sup>6230</sup> Ortíz, 1965, 61.

<sup>6231</sup> La Revolución del Sur de Dolores consistió en un levantamiento popular liderado por los propietarios de tierras del sur de la provincia de Buenos Aires contra la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Entre las causas económicas que ayudaron a promover la rebelión, se debe enfatizar la imposibilidad de exportar bienes primarios a Europa a causa del bloqueo francés.

<sup>6232</sup> Jurado, 1875, 155.

<sup>6233</sup> Halperín Donghi, 1982, 223.

<sup>6234</sup> Varela, 1911.

<sup>6235</sup> Varela, 1911; y Halperín Donghi, 1982, 226. Sobre los embargos a los "unitarios" de la campaña de Buenos Aires, ver Gelman y Schroeder, 2003.

---

<sup>6236</sup> Varela, 1911.

<sup>6237</sup> La cantidad total de tierra embargada por Rosas puede ser estimada aproximadamente a través de la cantidad de vacunos confiscada. De acuerdo a Varela, 650.000 cabezas de ganado fueron confiscadas, o el 10% del vacuno existente a un valor de 20 millones de pesos. Estas incluían 475.00 cabezas en los pagos del sur y 184,100 cabezas en los del norte, que con una proporción de 1.350 cabezas por legua cuadrada, podían dar cuenta de casi 488 leguas cuadradas embargadas, o 352 leguas cuadradas y 136 leguas cuadradas, respectivamente. Asimismo, 26.000 ovejas fueron confiscadas, o el 20% de las ovejas existentes a un valor de \$678.000; 154.000 cabezas en los pagos del sur y 72.000 cabezas en los pagos del norte, que con una proporción de 15.000 ovejas por legua cuadrada podían dar cuenta por 15 leguas cuadradas, o 10 leguas cuadradas y 5 leguas cuadradas, respectivamente. En forma similar, casi 70.000 caballos fueron confiscados, que con una proporción de 1.200 cabezas por legua cuadrada, daban cuenta de 59 leguas cuadradas embargadas. Pero, puesto que mucha de la propiedad entonces confiscada no estaba totalmente consolidada con ganado, debemos presumir que la cantidad de tierra embargada era mucho mayor. En cambio, si para encontrar la cantidad real de tierra embargada combinamos las listas publicadas por Varela con mis datos rurales inéditos, concluimos que el efecto económico neto de las confiscaciones de tierras fue el de fijar o inmovilizar 608 leguas cuadradas, 46 leguas cuadradas más que a través del método previo.

<sup>6238</sup> Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.

<sup>6239</sup> Cárcano, 1972, 115.

<sup>6240</sup> Coni, 1927, 128.

<sup>6241</sup> García, 1968, 36.

<sup>6242</sup> García, 1973, 49.

<sup>6243</sup> García, 1973, 51.

<sup>6244</sup> Dorner, 1971, 49.

<sup>6245</sup> La inmigración neta consiste de aquellos que permanecieron en el país, o la diferencia entre inmigrantes y emigrantes.

<sup>6246</sup> Gobernador de la provincia de Entre Ríos y jefe de gobierno de la Confederación Argentina.

<sup>6247</sup> Ghioldi, 1946.

<sup>6248</sup> Sebreli, 1972, 208.

<sup>6249</sup> Aquellos que sacaron ventaja de las confiscaciones de tierras fueron las cincuenta familias que apoyaban al terrorismo de estado de Rosas.

<sup>6250</sup> Otro método para determinar tal área consiste en substraer del área total transferida, la cantidad correspondiente a las rotaciones de derechos de arrendamientos procedentes de rotaciones previas. Entre 1858 y 1875, hubo 312 rotaciones públicamente registradas ascendiendo a 756 leguas cuadradas o el 46% del área total arrendada del estado y el 20% de la superficie total hasta entonces otorgada en propiedad privada. Como de aquellas 312 rotaciones, 83 eran de parcelas previamente transferidas por anteriores arrendadores, quedan que sólo 229 parcelas abarcando 552 leguas cuadradas fueron

---

transferidas en sólo una oportunidad. Es por ello que tenemos en realidad, el resultado que la tierra pública neta otorgada en arrendamientos, sería la diferencia entre el total de arrendamientos otorgados (524 arrendamientos, abarcando 1.641 leguas cuadradas) y los arrendamientos transferidos sólo una vez (229 arrendamientos, abarcando 552 leguas cuadradas), es decir, un total de 295 arrendadores que obtenían posesión de 1.089 leguas cuadradas. Como podemos ver, las cifras obtenidas por ambos métodos son bastante similares.

<sup>6251</sup> Cárcano, 1972, 248. Para una historia social y política de los terratenientes de la pampa húmeda, 1860-1945, ver Hora, 2002.

<sup>6252</sup> Cuccorese, 1959, 358.

<sup>6253</sup> Ortiz, 1965, 94.

<sup>6254</sup> Randall, 1977, 81.

<sup>6255</sup> Chiaramonte, 1969, 178.

<sup>6256</sup> Randall, 1977, 85. Para el ocaso de la sociedad de frontera en un pueblo de la campaña, Tandil, 1855-1875, ver Bjerg, 2003.

<sup>6257</sup> Chiaramonte, 1969, 184.

<sup>6258</sup> Olivera, 1868, 365.

<sup>6259</sup> Alvarez, 1936, 113.

<sup>6260</sup> Cárcano, 1972, 250.

<sup>6261</sup> *Ibíd.*, 250.

<sup>6262</sup> Registro Oficial, 1878, 245.

<sup>6263</sup> Cárcano, 1972, 168.

<sup>6264</sup> *Ibíd.*, 168.

<sup>6265</sup> *Ibíd.*, 169.

<sup>6266</sup> Rosa, 1969, 203.

<sup>6267</sup> Williams, 1920, 45; y Ford, 1962, 140.

<sup>6268</sup> Halperín, 1969, 217.

<sup>6269</sup> Scobie, 1964, 169.

<sup>6270</sup> Chiaramonte, 1969, 178.

- 
- <sup>6271</sup> Scobie, 1964, 169.
- <sup>6272</sup> Allub, 1972, 302.
- <sup>6273</sup> *Ibíd.*, 302.
- <sup>6274</sup> Scobie, 1964, 171.
- <sup>6275</sup> Sommi, 1957, 64 y 66.
- <sup>6276</sup> Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.
- <sup>6277</sup> Higley y Burton, 1989, 21; y Cammack, 1990, 415.
- <sup>6278</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.
- <sup>6279</sup> Domínguez, 1985, 163-168. El concepto de “apropiación de legitimidad”, desarrollado por Jorge Domínguez, lo tomó prestado de Lofchie (1964), y quince años más tarde pasó a ser reelaborado por Francois-Xavier Guerra, en lo que denomina ecuaciones de transferencia de legitimidad (Guerra, 1998, 134-139). Llama la atención que Guerra (1998) no menciona este trabajo pionero de Domínguez.
- <sup>6280</sup> Ver Krasner, 2001, 69-100.
- <sup>6281</sup> Ver Weaire, 2002.
- <sup>6282</sup> Frega, 1998, 128. Hay quienes asocian los caudillos con los monarcas absolutos, pero creo que se asemejan más a los señores de la guerra. Sobre la *symmakhia*, ver Meabe, 1998; y Esquivel, 2004. Sobre la diferencia entre señores de la guerra y mercenarios, ver Münkler, 2005.
- <sup>6283</sup> Debo esta reflexión a mi colega y amigo Joaquín E. Meabe.
- <sup>6284</sup> Debo esta última reflexión a mi colega y amigo Joaquín E. Meabe.
- <sup>6285</sup> ver Reyno Gutiérrez, 1973, 352-363; y Ocampo, 2003, 129.
- <sup>6286</sup> Halperín Donghi, 1979, 346.
- <sup>6287</sup> Sobre Estanislao López, ver Newton, 1967; y Busaniche, 1969.
- <sup>6288</sup> Pérez, 1949, 14. Sobre el contexto político en la década de 1820, ver Seckinger, 1976. Sobre el contexto marcado por la dominación portuguesa, el Imperio del Brasil y el ejército colombiano en el Alto Perú, ver Millington, 1996. Sobre la presencia masónica en la Cisplatina, ver Fernández Cabrelli, 1986.
- <sup>6289</sup> Ver Alvear, 2003, 129.
- <sup>6290</sup> Pérez, 1949, 28 y 30; y Halperín Donghi, 1979, 346.
- <sup>6291</sup> Sobre la asonada de Alvear, ver Pérez, 1949, 34; y Ocampo, 2003, 132-33. Pérez sugiere sordamente que las armas producto de este asalto fueron las que nutrieron el cargamento del Comandante Monteverde destinado a Ramírez, quien se hallaba acampado en Santos Lugares (Pérez, 1949, 35). En ese sentido, no habría que olvidar el viejo rencor que Alvear guardaba para con Artigas desde las épocas del sitio de Montevideo en 1814.
- <sup>6292</sup> Pérez, 1949, 45.
- <sup>6293</sup> Ocampo, 2003, 133.

---

<sup>6294</sup> Ocampo, 2003, 73 y 134.

<sup>6295</sup> Reyno Gutiérrez, 1973, 364-371; Ocampo, 2003, 134; y Di Meglio, 2006, 203 y 216.

<sup>6296</sup> Pérez, 1949, 31 y 36; y Ocampo, 2003, 135.

<sup>6297</sup> Ocampo, 2003, 135; y Di Meglio, 2006, 204.

<sup>6298</sup> Ocampo, 2003, 137.

<sup>6299</sup> Ocampo, 2003, 137; y Di Meglio, 2006, 205.

<sup>6300</sup> Di Meglio, 2006, 205.

<sup>6301</sup> Ver Heras, 1927; y Di Meglio, 2006, 205-219.

<sup>6302</sup> Halperín Donghi, 1979, 349.

<sup>6303</sup> Gianello, 1972, 149.

<sup>6304</sup> Gianello, 1972, 142.

<sup>6305</sup> Gianello, 1972, 135.

<sup>6306</sup> Pérez, 1949, 16.

<sup>6307</sup> Pérez, 1949, 39.

<sup>6308</sup> Pérez, 1949, 24, 41, 43, 48 y 51; y Gianello, 1972, 135.

<sup>6309</sup> Beraza, 1949; Pérez, 1949, 46; y Gianello, 1972, 135.

<sup>6310</sup> El control del río lo venía ejerciendo Buenos Aires desde los tiempos del Directorio cuando comandaba la Escuadrilla Matías Irigoyen (Caillet-Bois, 1944, 154-155). Sin embargo, dicha escuadrilla debió enfrentar la resistencia de las flotillas del rosarino Cosme Maciel y del artiguista Pedro Campbell.

<sup>6311</sup> Caillet-Bois, 1944, 205-206; Martínez Zuviría, 1967-69, 57 ; y Gianello, 1972, 137

<sup>6312</sup> Bustos se había sublevado un año antes en Arequito conjuntamente con el tucumano Alejandro Heredia.

<sup>6313</sup> Gianello, 1972, 140.

<sup>6314</sup> Sobre la supresión del Cabildo, ver Ternavasio, 2002, 91-98, y 264. Sobre los corsarios de Artigas, ver Beraza, 1949. Sobre los préstamos del comercio para solventar los gastos militares de Entre Ríos, ver Chiaramonte, 1986, 191 y 193. El principal comerciante encargado de iniciar la recaudación para financiar la milicia entrerriana comandada por Correa y Hereñú fue Ambrosio Lezica Torre Tagle, padre de su homónimo que actuó en 1853 en el soborno del Almirante Coe. Este Lezica era hijo del más relevante comerciante monopolista de la era colonial, Juan Antonio de Lezica y Osamiz. Sobre la Ley electoral de 1821, ver Di Meglio, 2006, 256-261. Para el acceso de la Confederación Argentina al crédito de la banca extranjera, ver Chianelli, 1974; Rato de Sambuccetti, 1999, 136-140; y Caldeira, 1995.

<sup>6315</sup> ver Caillet-Bois, 1944. Para el aporte extranjero a la conformación de las tripulaciones de las escuadras argentinas en las Guerras de Independencia y del Brasil, 1814-1830, ver Luqui-Lagleyze, 2007. Sobre la libre navegación del Río Mississippi, ver James, 1932. Y sobre la libre navegación de los ríos Rhin y Danubio, ver Chamberlain, 1923; y sobre otros ríos, ver Kaeckenbeeck, 1919.

<sup>6316</sup> Ver Weiss, 1868; Vernesco, 1888; y Engelhardt, 1879 y 1889. Sobre los tratados de San José de Flores

---

y la libre navegación de los ríos, ver Ruiz Moreno, 1970.

<sup>6317</sup> Caillet-Bois, 1944, 207-208; y Gianello, 1972, 138. Desplazado del poder, López Jordán se dedicó a la producción pecuaria con bastante éxito, lo cual se revela en el magnífico archivo que se encuentra depositado en la Academia Nacional de la Historia. El contrapunto entre Mansilla y López Jordán pareciera haber continuado en su descendencia pues las revueltas que en la década del 80 encabezara Ricardo López Jordán (h), ocasionaron que su lugarteniente José Hernández escribiera el *Martín Fierro*; y las campañas al desierto que organizara Lucio Mansilla (h) dejaron para la posteridad la obra titulada “Una Expedición a los Indios Ranqueles”.

<sup>6318</sup> Para los bloqueos navales en el Río de la Plata (1838 – 1850), ver Cady, 1943.

<sup>6319</sup> Ver Fitte, 1959; y Gallardo, 1960. Según Minutolo (1985), luego de la tremenda derrota naval de Martín García, sufrida por la flota porteña al mando del coronel austriaco Floriano Zurowski, quien bosquejó la idea salvadora del soborno a la flota enemiga fue el Capitán de la Guardia Nacional Mariano Billinghamurst, comandante del cantón Palacio, ubicado en la calle Santa Rosa, a las órdenes de José María Bustillo. Billinghamurst le confió a Torres que los datos que conocía acerca de la vida y conducta vulnerable de John Halsted Coe se debían a la amistad que con él mantenía su hermano Roberto, residente en Corrientes. Los que ordenaron la operación de soborno fueron el Gobernador Guillermo Pinto, el Ministro de Guerra José María Paz, el Ministro de Hacienda Francisco de las Carreras y el Ministro de Gobierno Lorenzo Torres, en la suma de 22.000 onzas de oro, que insumieron 200.000 pesos fuertes que debía recibir Coe y 300.000 los oficiales de la Escuadra. El dinero fue recaudado en un denominado “Centro”, que seguramente fue el Club de Residentes Extranjeros, fundado en 1841, cuya comisión pagadora estaba constituida por Julián Beláustegui y Antonio Linch. Los que se encargaron de entregarla en mano fueron Mariano Cané y Ambrosio Plácido Lezica (Minutolo, 1958, 107, 111 y 120). Lezica era hijo de Ambrosio Lezica, el mismo que actuó en 1820 en el suministro de armamento para el caudillo entrerriano Pancho Ramírez, destinado a batir a Artigas, y en la financiación de la Revolución de Riego (Cutolo, IV, 195). Sobre el Club de Residentes Extranjeros, 1841-1941, ver Navarro Viola, 1941.

<sup>6320</sup> Gianello, 1972, 149.

<sup>6321</sup> Gianello, 1972, 145-150.

<sup>6322</sup> Gianello, 1972, 151.

<sup>6323</sup> Sobre el Congreso Cisplatino, ver Pivel Devoto, 1937.

<sup>6324</sup> La cuarta ola progresiva, estuvo compuesta por cuatro etapas. En su primer fase, que arrancó con Caseros (1852) y concluyó con Pavón (1862), los conflictos políticos se zanjaron fundamentalmente a través de la secesión política y la violencia armada y secundariamente mediante el fraude electoral, la lucha parlamentaria y periodística, la negociación internotabiliar o las reivindicaciones agrarias y religiosas. Los conflictos políticos más graves se dieron en esta etapa en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Tucumán. En una segunda etapa que se inició en Pavón (1862) y se consolidó en San Jacinto (1867) y Pozo de Vargas (1867), los conflictos políticos se ajustaron fundamentalmente a través de una violencia armada institucionalizada entre un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja y Santa Fé. En un tercer período que se inició en San Jacinto y Pozo de Vargas (1867) y se interrumpió en La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se resolvieron a través de una violencia armada institucionalizada entre cuerpos de un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Cuyo, Catamarca, La Rioja y el Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos). Y en un cuarto y último período, dentro de la cuarta ola progresiva, que se inauguró en 1877 con la amnistía por los hechos de La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), los conflictos políticos heredados de la década del 60 se amortiguaron a través de una política denominada de Conciliación.

<sup>6325</sup> para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 4. En el tercer ciclo de Rivarola (1936), la idea-fuerza de la unidad nacional, iniciada en 1851, estalla en Pavón (Rivarola, 1936, 157).

<sup>6326</sup> Acuña, 1995a, 19.

---

<sup>6327</sup> ver Saguier, 1995f; y Zimmermann, 1996. La Ley de 1863 se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a los poderes públicos del orden federal. Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituida. La sedición no importaba, a juicio del Diputado Nacional Ramón T. Figueroa "...el desconocimiento de la autoridad constituida, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades de las provincias, porque según el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar general del país, porque deben afectar solamente la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la provincia donde esos disturbios se hayan producido" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello sacaba el Diputado Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, en el juicio que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero común radicados en la misma provincia donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89).

<sup>6328</sup> Comando en Jefe del Ejército (1972).

<sup>6329</sup> Saguier, 1995f. Sobre la Penitenciaría Nacional, ver García Basalo, 1979.

<sup>6330</sup> Cortés Conde, 1988, 321.

<sup>6331</sup> la nación asumió la deuda externa contraída por la Confederación Argentina.

<sup>6332</sup> En 1866, un artículo publicado en el periódico EL Uruguay (Concepción del Uruguay) criticó acervamente a la Legislatura, la que ofendida interpeló al Ministro, dada la relación que existía entre el periódico de marras y el Poder Ejecutivo. Este último no autorizó la concurrencia del Ministro negando los hechos imputados (Urquiza Almandoz, 1965, II, 431). En Córdoba, en 1867, el editor de El Mosquito Alberto Ortiz, fué atacado a latigazos por el Teniente Coronel Agenor Pacheco; y en 1868, la imprenta de El Progreso, dirigida por el laicista Ramón Gil Navarro, fué empastelada por los católicos (Bischoff, 1994, 111 y 113). En Entre Ríos, en 1871, el redactor de los periódicos El Rayo, y El Independiente, de filiación Jordanista, fué duramente apaleado (Urquiza Almandóz, 1965, III, 13). En Concepción del Uruguay, la imprenta donde se tiraba El Eco de Entre Ríos, un periódico Jordanista, fué empastelada en 1871, en un par de oportunidades, por orden del Gobierno provincial (Urquiza Almandóz, 1965, III, 328). Y en Corrientes, el caudillo Mitrista Plácido Martínez, por redactar el periódico La Patria, en franca oposición al gobierno de Manuel Derqui, le significó persecuciones, engrillamientos y prisiones (Mantilla, 1887, 95-97).

<sup>6333</sup> permítaseme citar a Saguier, 1996a.

<sup>6334</sup> Sergi, 1940, 141-146; citado en Di Tella, 1988, 349.

<sup>6335</sup> En Salta, en 1864, el Obispo Buenaventura Rizo Patrón se vió enfrentado con el Gobernador Cleto Aguirre a raíz de la inconducta del Pbro. Sixto Sáenz, de Rosario de Lerma (Cutolo, VI, 220-222; y Bruno, 1967, XI, Sección II, Cap.I-IV). En Santiago del Estero, en 1866, la Legislatura sancionó una Ley de Redención de Capellanías presentada por el Gobernador Absalón Ibarra que fué protestada sin éxito por el Obispo Rizo Patrón (Levaggi, 1992, 243). En La Rioja, el Gobernador Julio Campos recabó del Obispo José Vicente Ramírez de Arellano su conformidad para la venta de las capellanías incongruas. Una vez promulgada la Ley, el Vicario Tristán Sotomayor reclamó al gobierno por haber redimido capellanías de más de cuatro mil pesos (Levaggi, 1992, 275-278). En Córdoba, se aprobó una Ley presentada por el Gobernador Félix de la Peña prohibiendo nuevas capellanías (Levaggi, 1992, 291). En San Juan, el Gobernador Domingo F. Sarmiento se enfrentó con el Obispo Aldazor a propósito de la afectación de los capitales capellánicos a la educación; y el Gobernador José María del Carril propició las leyes de confiscación de capellanías y de supresión de conventos (Videla, 1975; y Levaggi, 1992, 302). Y en Santa Fé, fue resistida la secularización del cementerio del Convento de San Lorenzo, y su transformación en una Escuela Agronómica (Cecarelli, 1990).

<sup>6336</sup> Cantón, 1965; citado por Grondona, 1967, 188 y 192. Para conocer los debates que tuvieron lugar en el Senado americano con motivo de West Point durante la Guerra de Secesión y que deben haber influido sobre

---

Sarmiento, ver Lisowski (1988).

<sup>6337</sup> Fallos (Corte Suprema de Justicia), II, 121; citado en Palacios, 1947, 50.

<sup>6338</sup> Calhoun, 1993, 409, nota 19.

<sup>6339</sup> o en términos Leninistas, los caminos Prusianos (o vías Junker) de desarrollo capitalista.

<sup>6340</sup> A juicio de Cammack (1989), el inconveniente de la aproximación neo-institucionalista al tema es que Skocpol y Trimberger presentan al estado y la sociedad civil como polos separados y opuestos, negando en la práctica la existencia de clases sociales y aún de la existencia de lucha de clases en el seno de los propios aparatos de estado. Acerca del Nuevo Institucionalismo, ver los artículos de G. Almond, Scott Flanagan, Robert Mundt, T. Skocpol, R. Friedland, y R. R. Alford, en *Zona Abierta*, 63/64, 1993.

<sup>6341</sup> El Senador catamarqueño Angel Navarro era muy versado en la historia y la política Norteamericana. En 1868, en oportunidad del debate provocado por el Senador Nicasio Oroño, argumentó en favor de Catamarca y contra el Gobernador Maubecín, citando los casos de las rebeliones de Connecticut y Massachussets (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 18-IX-1868, p.551).

<sup>6342</sup> Senador Angel A. Navarro, Senado Nacional, 28-VIII-1866, 44a. Reunión, 41a. Sesión ordinaria, p.410.

<sup>6343</sup> Senador Angel A. Navarro, Senado Nacional, 28-VIII-1866, 44a. Reunión, 41a. Sesión ordinaria, p.410. Un cuarto de siglo más tarde, el Ministro del Interior Manuel Quintana, en su refutación al Diputado Nacional Osvaldo Magnasco, con motivo de la intervención federal a Santiago del Estero, ocasionada por el golpe de estado ocurrido en 1892 contra el Gobernador Absalón Rojas, sostuvo que "...Un gobierno, por el hecho de existir, tiene en su favor la presunción de la legitimidad; mas esa presunción, como todas las presunciones humanas, tiene que ceder a la prueba de la verdad. Mientras ese gobierno, cualesquiera que sean los vicios de su constitución, funciona regularmente, sin protesta y sin contestación, recibiendo el acatamiento popular, ¿a qué título, con qué derecho, con qué objeto, diré repitiendo las palabras testuales del discurso invocado por el señor diputado, irían los poderes federales a demandarles los títulos en cuya virtud existe? Cuando un gobierno no funciona regularmente, cuando no es acatado por el pueblo de la provincia, cuando, por el contrario, los convecinos puestos en armas logran derrocarlo, y se vé en la triste necesidad de acudir al último recurso de la intervención nacional, entonces, este hecho, que es el punto determinante, la base fundamental de la acción de los poderes públicos, impone deberes, pero acuerda derechos a los poderes interventores...Si la constitución nacional se hubiera limitado a decir poderes derrocados o poderes existentes, el señor diputado tendría perfecta razón para sostener que el poder ejecutivo, al desempeñar la autorización de intervenir, no tiene el derecho de examinar sus títulos, de apreciar su composición y decidir en consecuencia si son o no dignos de la protección nacional. Pero cuando la Constitución ha dicho, y dicho categóricamente, poderes constituidos, por más restrictiva que sea la justa interpretación de la disposición constitucional en materia de intervenciones, es necesario admitir ese derecho; porque la constitución no ha sido hipócrita para confundir poderes constituidos con simples poderes existentes" (Exposición del Ministro del Interior Manuel Quintana, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 23-X-1892, 5a. sesión extraordinaria, p.59).

<sup>6344</sup> miembro informante de la minoría de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, en oportunidad de discutirse la intervención a Salta, en 1877.

<sup>6345</sup> En el debate suscitado en 1877 acerca de la intervención a la provincia de Salta --provocada por el avasallamiento de su Colegio Electoral por parte de la Legislatura-- el miembro informante de la minoría de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Delfin Gallo, acompañado en ello por Eduardo Wilde, Vicente Fidel López y Pedro Uriburu, refutó ampliamente al miembro informante de la mayoría Dr. Luis Lagos García, quien fué apoyado por los Diputados Miguel Cané, Carlos Pellegrini y Guillermo San Román.

<sup>6346</sup> Dr. Delfin Gallo, Diario de Sesiones de la Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, pp.97-98.

<sup>6347</sup> para el caso Norteamericano, ver DiZerega, 1994.

<sup>6348</sup> cuñado de los Doctores Carlos Pellegrini y Delfin Gallo Terán.

---

<sup>6349</sup> Lagos García fué apoyado por los Diputados Nacionales Miguel Cané, Guillermo San Román, y su cuñado Carlos Pellegrini; y combatido por Vicente Fidel López, Eduardo Wilde; Pedro Uriburu y su otro cuñado Delfín Gallo.

<sup>6350</sup> Curtis (1854-58), Farrar, Martin, Pearsons, Webster (1862), Pomeroy (1868), Tiffany (1874), Cooley (1868), Cushing (1849, 1866), etc. De los parlamentarios argentinos el Senador Nacional Rafael Igarzábal era quien mas conocía la jurisprudencia norteamericana, en especial los casos de la revolución de Dorr en Rhode Island, y de Lutter en Luisiana (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.172). Con referencia a la obra de Webster, consultar Allen (1989), Current (1992), Peterson (1987) y Smith (1989). Igarzábal se lamentaba en 1878, en la sesión donde se debatió la suerte de Corrientes, que "...no tengamos todavía un comentario de nuestra Constitución, un comentario de sus 110 artículos, pero no uno que los tome aisladamente, olvidando el peligro de ponerlos en contradicción unos con otros, sino por el contrario, un comentario que los ponga en la relación propia, de manera que el uno se entienda por lo que dice el otro, y viceversa" (Senador Nacional Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.185). La falta de un libro de esta clase (debo creer que omite involuntariamente los Comentarios de su comprovinciano Sarmiento), "...es lo que hace que veamos a unos oradores sosteniendo su tesis con un artículo, y a los otros la contraria con otro. Esto es lo que nos tiene todavía en el abecedario del derecho constitucional, y lo que es peor todavía, lo que nos condena a continuar de la misma manera hasta tanto que entendamos que la Constitución se explica, ante todas cosas, con la Constitución misma" (Ibidem). Con posterioridad a esta observación del Senador Igarzábal empezaron a surgir obras como las de José Manuel Estrada, Aristóbulo del Valle, Manuel A. Montes de Oca y Joaquín V. González.

<sup>6351</sup> Fué Diputado al Congreso de la Confederación, Senador Nacional y Presidente de la Cámara de Justicia en 1859 (Cutolo, VII, 436). Era hermano menor de los Coroneles y Gobernadores Dámaso, Evaristo y Juan Nepomuceno Uriburu, padre de los Gobernadores de Formosa José María Uriburu Arias y de Tucumán Pedro José Uriburu Arias (GP/Tuc.1874); suegro del Gral. Teodoro García; y del Senador Nacional Segundo Linares Sanzeteña (SN.1875-80); y tío carnal del Presidente José Evaristo Uriburu.

<sup>6352</sup> Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Para una comparación entre las Constituciones Americana y Argentina respecto al derecho de intervención, ver Weddell (1937); citado por Shumway, 1993, 173, nota 1.

<sup>6353</sup> Con referencia a las virtudes de los Presidentes Yanquis, Francisco Roca le contaba a su primo hermano Julio A. Roca que en USA los Presidentes "...comen duraznos con cáscara por las calles, y luego son llevados por un Gendarme a la policía para pagar la multa por haber galopado con su carruaje en lugares que está prohibido. El primer magistrado del país, obedece al soldado, vá, paga, y se retira" (Francisco Roca a J. A. Roca, Rojas, 14-V-1882, AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.23). Acerca de las virtudes republicanas Argentinas, para el Senador Nacional por Corrientes Juan E. Torrent, "...saber caer y saber estar caído...es la virtud que he procurado conquistar para mí, y que quisiera ver sólidamente adquirida por todos mis compatriotas" (Juan E. Torrent, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.214). Caer, en la acepción decimonónica, no era perder económicamente, sino "...poner en riesgo el status social con la pérdida económica" (Wolin, 1972, 353). Los conceptos de ganar o pararse y de perder o caerse, provenientes de la cultura greco-romana, tenían en la cultura occidental decimonónica un lugar distinto (MacIntyre, 1987, 163). Y Vicente Fidel López, en su Historia de la República Argentina, sostenía que donde la disciplina de los partidos no estuviere concentrada en clases superiores (intelectuales y morales) "...el movimiento sano de las instituciones políticas, se ha de convertir necesariamente en juego de tahures; han de desaparecer de la escena los hombres probados que el país conoce y respeta, improvisándose los aventureros, que sin responsabilidades, ni antecedentes sentados en la opinión pública, obran en lo político como la mala moneda en lo económico, expulsando los valores verdaderos y criando los especuladores fraudulentos" (López, 1890, IX, 60; citado en Oría, 1946, 113-114).

<sup>6354</sup> Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Esta misma tesis fué expresada en los mismos términos treinta años después por Rodolfo Rivarola (Rivarola, 1908, 27 y 29). Sin embargo, tanto Uriburu como Rivarola desdénan la similar o peor realidad que padecían los estados esclavistas del sud de la Unión antes y durante la Guerra de Secesión (ver Hyman, 1973, capítulos XXVII y XXVIII; y Perman, 1984, capítulos 8 y 9).

<sup>6355</sup> Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Así como el artículo 6o., tan relevante es el art. 5o. en la arquitectura de nuestra Constitución que el Senador Rafael Igarzábal fué el primero en destacar que el mismo "...está colocado en el capítulo de las declaraciones,

derechos y garantías de la Constitución, que es la parte donde el pueblo argentino ha puesto las barreras que quería oponer al gobierno general. Entonces, pues, el artículo está puesto, no como una puerta por donde el Gobierno de la Nación puede entrar en las provincias, sino como centinela, como garantía de que no entrará" (Senador Nacional Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.186). Pero los delitos de sedición y rebelión del art. 6 de la Constitución Nacional, de la Ley de Justicia Federal de 1863, y del Código Penal no recaían, para el Diputado Nacional por Córdoba Ramón T. Figueroa, en su réplica de 1892 al Diputado Gonnet, sobre el mismo objeto. El Código Penal, para Figueroa, "...se ocupa de clasificar los delitos de rebelión y de sedición con relación exclusivamente a las autoridades provinciales; casos de rebelión y de sedición que no están legislados en la Ley de 1863, la que se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a los poderes públicos del orden federal...Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituida. La sedición no importa el desconocimiento de la autoridad constituida, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades de las provincias, porque según el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar general del país, porque deben afectar solamente la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la provincia donde esos disturbios se hayan producido" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello sacaba el Diputado Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, en el juicio que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero comun radicados en la misma provincia donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89).

<sup>6356</sup> Acuña, 1995a, 19.

<sup>6357</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 16.

<sup>6358</sup> a imagen y semejanza de los programas de Fusión y Conciliación entre Blancos y Colorados propuestos en la República Oriental del Uruguay primero en 1855 y más luego en 1886 por los Partidos Conservador y Constitucional, respectivamente (Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309; y Moraes, 1995, 82-83).

<sup>6359</sup> para el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, la política de la Conciliación era en lo interno "...un principio parecido al de arbitraje en las cuestiones internacionales; es un principio moderno nacido de la tolerancia y del respeto mutuo por las opiniones, y un medio de armonizar esas mismas opiniones (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.213). Y para Noble (1960) significaba "...la lucha leal en comicios libres con el consiguiente peligro de perder el poder, o la coincidencia en listas comunes con la entrega de cargos representativos importantes a adversarios más o menos irreductibles" (Noble, 1960, 309). En el plano nacional la política de la Conciliación fue apoyada por Antonino Cambaceres.

<sup>6360</sup> ver Melo, 1963. Para Ortiz (1977), la etapa del colapso iniciada en 1820 perduró hasta la misma Federalización de Buenos Aires, concretada recién en 1880.

<sup>6361</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 64.

<sup>6362</sup> hijo del Coronel Martiniano Leguizamón, natural de Gualaguay, y de Paula Rodríguez, natural de Nogoyá; y primo segundo de los Generales Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h).

<sup>6363</sup> Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6364</sup> para conocer su naturaleza de gozne entre la ciudad y la campaña, ver Tío Vallejo, 1997, 23, 30 y 39.

<sup>6365</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Sesión ordinaria, pp.161-199.

<sup>6366</sup> alimentado por la crisis desatada con motivo del proteccionismo financiero aplicado por Bayo en favor

---

del Banco Provincial y en contra de la filial del Banco de Londres (ver Damianovich, 1977).

<sup>6367</sup> hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candioti Larramendi; marido de Mercedes Zavalla Comas; padre del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y de los Diputados Nacionales Urbano Ramón Iriondo Zavalla y José María Iriondo Zavalla; suegro de Bernardo de Irigoyen Olascoaga; cuñado del Gobernador Canónigo Manuel María Zaballa Comas, del Vice-Gobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y del Diputado Nacional Leónidas Zavalla Comas; y concuñado del Gobernador de Córdoba Manuel Demetrio Pizarro Leanes.

<sup>6368</sup> De Marco, 1977, 167.

<sup>6369</sup> hijo del Gobernador Delegado de Entre Ríos Antonio Crespo Zabala y de María Dolores Candioti Larramendi; hermano del Gobernador de Entre Ríos Manuel Crespo; y marido de Angela Leyva.

<sup>6370</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 133.

<sup>6371</sup> hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía (GPv.1861) y Gregorio Pampín y Goytía (GP.1872).

<sup>6372</sup> alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya.

<sup>6373</sup> había sido Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel Victorio Gelabert. Era hijo del Presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui, nacido en Córdoba, y de la correntina Modesta Cossio y Vedoya; y marido de Mercedes Llano y Molinas.

<sup>6374</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1878, p.194.

<sup>6375</sup> nacido en 1834, Camarista del Superior Tribunal de Justicia, Diputado Provincial, Convencional Constituyente y Diputado Nacional (1874-78). Era hijo de Francisco Plácido Cabral y de Rosa Díaz Colodrero, marido de Dorila Alvarez y De Latorre (Cutolo, II, 23).

<sup>6376</sup> El Senador Nacional Rafael Igarzábal manifestó en el Senado que "...fueron elegidos electores los empleados del Poder Ejecutivo, Diputados a la Legislatura, individuos que no tenían la edad marcada por la Constitución, personas que no tenían la renta correspondiente, y hasta se dio por hecha una elección que no había tenido lugar" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.176). En carta a Dardo Rocha, José Bartolomé Arias le relata que en Corrientes, la rebelión es una cuestión social, "...le aseguro que hoy son capaces de levantarse hasta las mujeres y los niños contra el Dr. Derqui, este ha procedido de tal manera que ni con el apoyo de la Nación logrará imponer a este pueblo" (José Bartolomé Arias a D. Rocha, Corrientes, 11-IV-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>6377</sup> artículos 28 y 29.

<sup>6378</sup> ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1878, 13a. Sesión ordinaria, pp.101-239. En Marzo de 1878, Derqui le manifiesta a Rocha "...tan indignado estoy con la intervención, que he estado a punto de retirarme, dando un manifiesto explicando lo que ocurre y lo ocurrido desde la llegada de la maldita misión Conciliadora, pero me he detenido y sufro porque comprendo que entregada esta Provincia a los Anarquistas, en poco tiempo mas o antes la República o Mitre se hace dueño absoluto del litoral, cuyos Gobiernos serían entregados a los Mitristas en aras de la malhadada Conciliación como está a punto de ser entregado el de esta Provincia. El desarme ha sido una farsa grosera, no han entregado una sola arma útil, esto poco importaría, pero lo grave es, que el Interventor deja que los rebeldes mantengan sus actividades en varios Departamentos, donde nuestros amigos son vejados, saqueados y hasta asesinados, mientras que en los Departamentos donde existen autoridades nuestras, los anarquistas gozan de inmunidades también para insultar, y conspirar, porque el Sr. Interventor nos ata las manos y estamos siendo el juguete de cuatro bandidos...que alentados desde esa y escudados por el Interventor hacen lo que les parece" (M. Derqui a D. Rocha, Corrientes, 25-III-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>6379</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127.

---

<sup>6380</sup> cuñado del Diputado Nacional Justino Solari.

<sup>6381</sup> debe aclararse que los Jueces de Paz fueron en toda esta época jueces legos y no letrados.

<sup>6382</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>6383</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>6384</sup> de la Esquina y de Goya.

<sup>6385</sup> residente en Santa Rosa (Estado Oriental).

<sup>6386</sup> "...que es muy valiente, sin influencia, pero indomable por su carácter" (Lorenzo Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>6387</sup> el vencedor de Naembé, contra las fuerzas de Ricardo López Jordán.

<sup>6388</sup> Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>6389</sup> Noble, 1960, 301 y 303.

<sup>6390</sup> el vencedor de La Verde.

<sup>6391</sup> tuvo lugar en un sitio denominado Cafarreño, que no figura en los diccionarios geográficos de Amílcar Rázori y de Aparicio y Difrieri.

<sup>6392</sup> el mismo que había sido batido por el Gral. Nicanor Cáceres, (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado), en las cuchillas de Garay) en 1868 (Mantilla, 1887, 116-120).

<sup>6393</sup> Líder del Club del Pueblo. Era hijo del caudillo Rosarino Pascual Rosas; y suegro del Diputado Nacional por Santa Fé Luis Lamas (sobrino de Andrés Lamas).

<sup>6394</sup> En Corrientes, el Diputado Nacional Manuel Derqui le informaba a Roca que desde un periodiquín titulado Alto Paraná, el ex-Ministro Severo Fernández, del gobierno de J. L. Madariaga,

"...célebre negociante a lo [Antonio] Gallino,...sólo consigue el ridículo, [pues] no quieren conformarse con que se les halla terminado lo que Vd. tan propiamente llama el saqueo de tierras" (M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 3-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26).

<sup>6395</sup> En la batalla de Ifrán murieron los Coroneles Luciano Cáceres y Onofre Aguirre, "...es decir el 1o. y 2o. Jefe del Ejército a más de seis jefes y como 50 de tropa. Cáceres hombre nulo como militar era incapaz de mandar no digo un ejército pero ni un Regimiento y solo tenía el valor personal pero le hicieron creer que era capaz de todo y el gaucho ambicioso pagó con la vida su temeridad. Aguirre aunque tan incapaz como Cáceres para el mando de un Ejército pero era mucho menos pretencioso y se hizo matar por no cargar con la vergüenza de tan fea derrota. El Coronel mil veces le aconsejó a Derqui y a Rosas que pusiere al mando del Ejército al Coronel Acosta pero no lo quisieron hacer por cuanto ya con Cáceres había arreglos para las diputaciones" (José María Pizarro a Dardo Rocha, Goya, 24-II-1878, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). Y en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó electo Juárez Celman, el Comandante Lorenzo Anadón le refería a Rocha que Galiano (emigrado en San José de Feliciano, Entre Ríos, y de alguna influencia en el Departamento del Sauce y en Curuzú Cuatiá), el Mayor Anastasio Fernández (de la Esquina), el Mayor Aquino (de Curuzú Cuatiá), y los hermanos Galarza (de Curuzú Cuatiá),

"...son enemigos de la situación, siendo muy fácil intentar por su cuenta y riesgo una revolución, porque así son los Correntinos, siempre creen que su provincia es potencia aparte y que cualquiera tiene derecho a cambiar el estado de cosas por mangas o por faldas" (Lorenzo Anadón a Dardo Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

---

<sup>6396</sup> Vidaurreta, 1962-67, 274; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127.

<sup>6397</sup> Heras, 1963, 172.

<sup>6398</sup> el conflicto político autonomista-liberal se repitió en agosto de 1893 y en Octubre de 1907.

<sup>6399</sup> Para la rebelión de López Jordán, ver Chávez (1957) y Reula (1963-69). En carta a D. Rocha, Juan Antonio Martínez le expresaba con relación a la gente de Entre Ríos que "...aquí la jente está muy corrompida. Todos adoran el éxito, pero nadie quiere esponerse a los azares de una lucha. Los resabios del pasado, la falta de hábitos, los vicios engendrados por los gobiernos personales, todo eso son grandes dificultades con que tenemos que luchar. Aquí se cree generalmente, que luchar contra el gobierno es tiempo perdido. Apenas se les dice a los partidarios de una candidatura que esta no merece las simpatías del gobierno, cuando ya la mitad ha defecionado creyéndola imposible" (Juan A. Martínez a D. Rocha, Concepción del Uruguay, 11-V-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>6400</sup> Hermano del Derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de Salta (Bidondo, 1980, 399). Consagrado como Gobernador, y apoyado por Francisco J. Ortiz y familia, sufrió Torino un frustrado intento revolucionario en Septiembre de 1878, que provocó la disolución de la Legislatura (Napoleón Uriburu a J. A. Roca, Salta, 21-I-1878, Archivo Roca, Leg.5). Según el ex-Gobernador Delfín Leguizamón, los Ortiz

"...lo que quieren es librarse de Uriburu no solo porqué tiene influencia, sino por odio a él y por que aspiran a ocupar su puesto, le hacen una guerra indigna, de chismes, y mezquindades de que solo ellos son capaces" (Delfín Leguizamón a J. A. Roca, Salta, 2-IX-1878, Archivo Roca, Leg.5).

Si en definitiva, la revolución contra Uriburu prevaleciera, con la jefatura del sarmientino Plácido Sánchez de Bustamante, Domingo T. Pérez le exclamaba a Roca, que

"...será preciso luchar y luchar mucho, para vencer en la cuestión nacional [elección presidencial], pues como ya le anuncié a Vd. por telégrafo, el partido que aquí se denomina conspícuo, tiene compromisos formales, por una parte con Tejedor y por otra con Sarmiento" (Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>6401</sup> Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.10).

<sup>6402</sup> cuñado del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante.

<sup>6403</sup> hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado con Fernández de los Santos. Era suegro de Nicolás Ojeda y cuñado del Coronel Napoleón Uriburu.

<sup>6404</sup> Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). Si esta alianza se concretara, Domingo T. Pérez le auguraba a Roca que "...el peligro de una reacción en favor de [la candidatura presidencial] Sarmiento, tomaría proporciones alarmantes" (Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>6405</sup> como luego en 1886 estuvieron al servicio de la candidatura de Bernardo de Irigoyen.

<sup>6406</sup> ex-Gobernador Interino, nombrado por los Conspícuos. Sobrino o hermano de Francisca Cau, mujer del Conductor del Situado Real Potosino de 1807 Don Gabriel Cuñado. Dicha Doña Francisca, una vez viuda contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde.

<sup>6407</sup> A la cabeza de 200 infantes y 100 hombres de caballería, el Ministro Orihuela con el Coronel Villegas "...se colocaron en Chorrillos de vanguardia de una fuerte división que venía de la Puna comandada por el Presidente de la Legislatura y el Coronel Laureano Saravia" (José Manuel Fernández a Julio A. Roca, Salta, 8-VI-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Sabedor el Cnel. Villegas que 400 revolucionarios marchaban a batirlos

"...desprendió una guerrilla de infantería para que saliera a toparlos, con orden de tirotearlos y replegarse en retirada a fin de que los revolucionarios empeñados en la persecución cayeran al punto donde les había colocado una emboscada compuesta de los 100 hombres de caballería armados a

---

lanza". (Ibídem).

Embriagados con el placer de la fuga de los guerrilleros de Villegas, los revolucionarios "...se introdujeron todos en Chorrillos, donde fueron recibidos con una sola descarga cerrada y lanzados por la Caballería emboscada". (Ibídem). De este encuentro resultaron 7 muertos, 15 heridos, y 200 prisioneros.

Pese a la derrota militar, los Conspicuos insistieron, y el 24 de setiembre de 1879, al mando de Lizárraga, triunfaron en Humahuaca, apoderándose del Cnel. Villegas e invadiendo la capital bajo el mando de Silvestre Cau. Muerto el Ministro Orihuela, sus fuerzas se rindieron el 1 de Octubre bajo una capitulación en que se estipulaba que el Gobernador interino sería elegido "por todo el pueblo", recayendo la designación en Fenelón de la Quintana, motivo por el cual Torino solicitó desde su exilio en Salta la intervención federal (Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 127; y Fidalgo, 1989).

<sup>6408</sup> la candidatura de Sarmiento estaba patrocinada por un desprendimiento del Partido Republicano, apoyada por Aristóbulo del Valle (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64; y Campobassi, 1980, 347). Su designación como Ministro del Interior ocasionó la caída de los Ministros Laspiur, Lastra y Montes de Oca, suplantados por Benjamín Zorrilla, Lucas González y Miguel Goyena (Campobassi, 1980, 359) y obedecía al interés de Avellaneda de combatir la candidatura de Tejedor y favorecer la de Roca. La caída de los Ministros Lastra y Montes de Oca obedeció al proyecto de ley propuesto por Sarmiento de establecer el derecho exclusivo de los poderes federales para organizar y convocar a los guardias nacionales (Campobassi, 1980, 358).

<sup>6409</sup> compuesta mayoritariamente por los revolucionarios Conspicuos.

<sup>6410</sup> En los considerandos Sarmiento calificó de "...inaceptable el requerimiento formulado por los cinco legisladores, observando consecuencia de esa manera con su opinión de que los diputados sólo pueden producir actos válidos en el seno de la Legislatura, desechó el requerimiento del Gobernador Interino y afirmó finalmente que los efectos del mencionado artículo se cumplirían con rigor solo restableciendo las autoridades y las cosas a su estado de antes de la revolución o aceptando los comicios ya realizados y pendientes de escrutinio. En la parte dispositiva por el contrario, ordenó que se convocaría al pueblo para que repitiese las elecciones y se pusiera en posesión del cargo al ciudadano que resultare electo" (Sommariva, 1929, I, 440).

<sup>6411</sup> J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). El ejemplo hallaba semejanza pues

"...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar en la moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el misterio los planes más audaces en satisfacción de los sentimientos más cobardes" (Ibídem).

<sup>6412</sup> marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (Calvo, VI, 35). Era concuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda.

<sup>6413</sup> J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6414</sup> político santiagueño, hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse.

<sup>6415</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). Para Pepe Posse, opuesto a la doctrina de Sarmiento, lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de Representantes entresacó de las minorías contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención francesa, la absorción de todos los poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala

---

VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6416</sup> hijo del Gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo Latorre; y cuñado del Gobernador Luis Linares Usandivaras (GP.1907-10).

<sup>6417</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9).

<sup>6418</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9).

<sup>6419</sup> No era el problema, para Rojas, el número de votos que se pudieren malograr al perder una o dos provincias

"...sino la desmoralización que ella introduciría en nuestras filas, lo cual alentaría al mismo Tejedor, que se ha atrevido a ser insolente hasta en presencia de la opinión uniforme de todas las provincias" (Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9).

<sup>6420</sup> Don Plácido era tío segundo del Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante. Como "...en estos días había de nombrarse al Juez Vallejo interventor en Jujuy. Felizmente nos apercibimos a tiempo de que no nos era afecto y trabajamos en el sentido de impedir su nombramiento. Ahora sí que hay el pensamiento de nombrar al Dr. Vicente Saravia, primo hermano del Dr. [Pedro Antonio] Pardo. Ha sido llamado con ese objeto" (Carlos Casares a J. Roca, Buenos Aires, 30-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9)

<sup>6421</sup> Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Paso de la Balsa, 12-VI-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6422</sup> O. Ojeda a Julio A. Roca, 1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>6423</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). En cuanto al Uriburismo de Obejero, Posse fué más preciso pues "...ha entrado en el plan por interés material" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). Obejero tenía en territorio Jujeño considerables plantas de caña "...y como la Legislatura de esa provincia ha establecido un impuesto de tres reales por surco de caña se subleva contra el impuesto tras de fundar un gobierno que lo revoque o no lo cobre" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>6424</sup> Heras, 1963, 184. En carta a J. A. Roca, Luis Leguizamón le confiesa que "...el sentimiento de localismo no estaba muerto en la provincia más localista de la república [Buenos Aires] y se ha despertado del sueño en que yacía, y se ha despertado terrible, amenazando la nacionalidad argentina como la amenazó antes. Esa es la obra de Tejedor fomentada por la cobardía de Avellaneda. Nos han resucitado los odios que nos dividieron en Confederación Argentina y en Estado de Buenos Aires. Ha vuelto a flamear en las calles de la ciudad populosa la bandera maldita que hizo teñir de sangre de argentinos los campos de Cepeda y de Pavón. Esto ha traído al país una situación violentísima, que en mi juicio no se resolverá sin derramar nuevamente sangre. Estamos colocados en un disparadero terrible. O nos dejamos imponer por el localismo porteño, o nos aprestamos a salvar nuestros derechos y libertades por nosotros mismos. En el primer caso, desaparecemos, las provincias se pierden como poder de opinión, no se libentarán ni en cien años del tutelaje de Buenos Aires que pesará sobre ellas como una plancha de plomo oprimiendo sus libertades, pues no solamente en Buenos Aires se elegirá el presidente de la república sino que allí se designarán los gobernadores de las demas provincias. A que rol quedarán estas reducidas! Se subleva el sentimiento con el solo hecho de pensarlo, y hay que ocuparse activamente, sin perder tiempo, de evitar que lleguemos a tan desgraciado extremo, pues sería entonces preferible la república unitaria antes que estar haciendo farsa grosera del sistema federal. Y no sería extraño que a eso viniésemos, al unitarismo puro, tan odiado por los pueblos argentinos" (Luis Leguizamón a J. A. Roca, Uruguay, 22-II-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>6425</sup> Noble, 1960, 296.

<sup>6426</sup> Noble, 1960, 296.

<sup>6427</sup> Este debate ha sido a mi juicio el más trascendental de la historia del parlamento argentino, y paradójicamente el más ignorado.

---

<sup>6428</sup> Los Republicanos eran un desprendimiento del Autonomismo que se había fraccionado en vísperas de las elecciones del 80, por un lado en el grupo encabezado por Dardo Rocha que cerró filas con Roca, y por el otro los que con Aristóbulo del Valle apoyaron a Sarmiento y los que con Leandro Alem sostuvieron a Bernardo de Irigoyen (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64).

<sup>6429</sup> Sommariva, 1929-31, II, 20.

<sup>6430</sup> representado el Mitrismo por Francisco J. Ortiz.

<sup>6431</sup> Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 a los 97 años de edad. Era hijo de Francisco de Paula Ortiz y de Azucena Alemán Tamayo, y primo hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola, y de Miguel S. Ortiz Viola (Cornejo, 1983, 131-135; y Platt, 1995/96).

<sup>6432</sup> hermano de Gabino Ojeda.

<sup>6433</sup> La oposición a Ortiz se trató de hacerla con Ojeda, "...pero vino un telegrama de [Luis del] Carril [en el futuro acérrimo Rochista] en el que nos decía que no nos dividiésemos que se desista de Ojeda y se le den los votos a Pancho [Ortiz]. Muchos han desistido y hemos quedado en más poco número, pero entonces los verdaderos amigos de Vd. Solá, Ibazeta y yo, insistimos en que los muchos o pocos votos de nuestra familia sean para Vd., y en este sentido seguimos nuestros trabajos" (Marcos Figueroa a V. de la Plaza, Salta, 2-X-1879, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-1, fs.618).

<sup>6434</sup> Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6435</sup> Según Gabino Ojeda, hermano de Olegario "...todas las promesas hechas a Olegario eran mentidas, y que solo habían sido una estrategema, puesta en juego por algunos para llegar a ciertos fines, que el no haría nada por la candidatura de su hermano, porque todo trabajo no daría por resultado otra cosa que imponer sacrificios pecuniarios a su hermano, sin esperanza alguna" (AGN, Benjamín Zorrilla a Julio A. Roca, Salta, 13-XI-1877, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6436</sup> Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6437</sup> hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche, y marido de Mercedes Cornejo Castellanos (Cutolo, IV, 153). Era medio hermano del Gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del Diputado Nacional Delfín G. Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín Dávalos Isasmendi (Cornejo, 1972, 83).

<sup>6438</sup> Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 8-IX-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5).

<sup>6439</sup> *Ibidem*.

<sup>6440</sup> Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6441</sup> Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>6442</sup> *Ibidem*.

<sup>6443</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 21-VIII-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.538).

<sup>6444</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730).

<sup>6445</sup> Refiriéndose a los Figueroa, Martín G. Güemes afirmaba que apadrinaban "...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia" (Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

<sup>6446</sup> "...Los Diputados y Senadores que han votado por Vd. son: mi padre Mariano Figueroa, mi sobrino

---

carnal el Dr. Abrahám Echazú, mi tío Alejandro Figueroa, mi tío Eugenio Figueroa, mi primo Abelino Aráoz, el Dr. Adolfo Valdés y Dr. Juan C. Tamayo, amigos íntimos de Echazú quien les sacó el voto para Vd." (Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730).

<sup>6447</sup> Francisco Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 11-XII-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>6448</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Jujuy, 31-I-1880 (AGN, Sala VII, 5-1-2, fs.130).

<sup>6449</sup> Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz.

<sup>6450</sup> *Ibidem*.

<sup>6451</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730.

<sup>6452</sup> Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola Otero (Cornejo, 1983, 270; y Platt, 1995/96).

<sup>6453</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 29-XI-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13).

<sup>6454</sup> Manuel Vicente Peña a Julio A. Roca, Salta, 1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13).

<sup>6455</sup> Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 19-I-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5).

<sup>6456</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10).

<sup>6457</sup> Nougues fué el fundador del Club del Pueblo, el cual tenía de su parte en 1879 "...a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos" (Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Era hijo del francés Juan Nougues, y de la tucumana Josefa Romero Urrea, marido de C. Oromí y Saavedra, hermano de los legisladores Juan Luis y Ambrosio Nougues Romero, y tío del Gobernador Juan Luis Nougues Terán y del Diputado Nacional Ambrosio Ascasio Nougues.

<sup>6458</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10).

<sup>6459</sup> Bravo, 1995, 10-11.

<sup>6460</sup> Hijo de Domingo Martínez y Cornelia de las Muñecas, casado con Lucila López Murga, y tío carnal del Diputado Nacional Zenón Santillán

<sup>6461</sup> Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 26-IX-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5); y Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 13-XI-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6).

<sup>6462</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6).

<sup>6463</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-XI-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6).

<sup>6464</sup> Lídoro Quinteros a Julio A. Roca, Tucumán, 13-X-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6).

<sup>6465</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6).

<sup>6466</sup> Esta facción "...tenía tres votos en el Colegio Electoral: Marcelino Rosa, [Ricardo] Viaña, y Pereyra" (Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 26-IX-1878, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). Don Próspero era primo hermano del Ministro de Instrucción Pública Eduardo Wilde y primo político del Diputado Provincial de Salta Isidoro López. El apodo de Flor de Manzanillo obedecería al hecho de ser rubio, pues dicha flor es de color amarillo.

---

<sup>6467</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6468</sup> Hijo del mártir de Metán Marco Avellaneda, y hermano del Presidente Nicolás Avellaneda.

<sup>6469</sup> entre los cuales figuraba Ataliva Posse, Dr. José María Astigueta y Javier López. Astigueta, a juicio de Nougues, "...pronto debe casarse con Angélica Posse [Silva], hija de Don Manuel [Fundador del Ingenio San Vicente], de quien podrás valerte si es que como sé que te lo tiene prometido, estuviese dispuesto a ayudarte, tendría una oportunidad para ello haciendo valer su influencia para su futuro yerno" (Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Sobre Javier López, "...tiene mucha influencia Don Manuel Ocampo de Buenos Aires y por lo que se me ha dicho está este Sr. en muy estrecha relación con vos. Consiguiendo a Ataliva, Astigueta y a Don Javier López, [hijo de Javier López Molina y de Lucía Aráoz, y marido de Isabel Paz Terán] los demás Unionistas los tendríamos a nuestro lado con seguridad" (Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6470</sup> Constituidos, según Miguel M. Nougues, por los Padillas, Frías, Terán, Colombres, y Gallos y otros "...y en una palabra la mayor parte de la gente de importancia estaría con nosotros como está ahora mismo, en que casi todos los tengo bien pronunciados y comprometidos para trabajar por Roca" (Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 4-III-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6471</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6472</sup> Ibidem.

<sup>6473</sup> Ibidem.

<sup>6474</sup> Ibidem.

<sup>6475</sup> Miguel M. Nougues a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6476</sup> Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6477</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6478</sup> Miguel M. Nougues a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6479</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6480</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). Para Lira (1945), Mamakunas eran las "matriarcas o abadesas de Ahlla Wassi quienes estaban al cuidado de las vestales del Sol" (Lira, 1945, 618).

<sup>6481</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10).

<sup>6482</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10).

<sup>6483</sup> La Constitución Provincial establecía --al igual que en las sesiones extraordinarias de calificación de votos de los Cabildos coloniales (donde se impugnaba a aquellos candidatos que padecían de tachas o vicios)- que los legisladores cesantes entran a considerar el primero de Septiembre de cada año electoral las actas de los electos.

<sup>6484</sup> Abogado del Ferrocarril.

<sup>6485</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6486</sup> Ibidem. Para Pepe Posse lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de

---

Representantes entresacó de las minorías contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención francesa, la absorción de todos los poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6487</sup> *Ibidem*.

<sup>6488</sup> *Ibidem*.

<sup>6489</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6490</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6491</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6492</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6493</sup> *Ibidem*.

<sup>6494</sup> *Ibidem*.

<sup>6495</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6496</sup> reponer las Legislaturas disueltas y convocar a elecciones sólo para substituir a aquellos cuyo mandato había fenecido (Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). Esta teoría Sarmientina estaba estrechamente ligada con la concepción que Sarmiento tenía del municipio. Si bien es cierto que en un principio, Sarmiento (1853) manifestó juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana, posteriormente Sarmiento (1883) fué modificando este criterio, a la luz de las lecturas de Tocqueville y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo mediante autoridades militares sin el paralelo establecimiento de las correspondientes instituciones municipales (Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952). A propósito de Botana (1984), ver los comentarios críticos de Halperín Donghi (1986).

<sup>6497</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6498</sup> José M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 13-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>6499</sup> Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). En Graneros, por ejemplo, donde había triunfado el candidato Unionista con 400 votos, fué elegido el Sr. Marco Avellaneda, que obtuvo sólo 30 votos (*Ibidem*). Lo mismo sucedió en Trancas y Río Chico. En Monteros, las cifras difieren groseramente. Mientras según el Gobernador Interino José M. Astigueta, los Dres. Aráoz y López "...obtuvieron ciento y tantos votos y los Sres. Vicente y Domingo García veinte y tantos" (J. M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7); para el abogado del Ferrocarril Central Norte Luis F. Aráoz, los Mitristas Vicente y Domingo García tuvieron 120 votos contra 600 que obtuvieron los Unionistas Dr. Benjamín Aráoz y Dr. López (Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Para Pepe Posse, fueron los extravíos de la Sala y el bombo de la prensa de oposición los que envalentonaron a un grupo de nacionalistas (Mitristas) de Monteros, que "...armaron y atropellaron a los Aráoz, que son todo Monteros y con ocasión de una elección de Municipales se tomaron a balazos resultando tres muertos y 500 heridos" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 23-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). La oposición compuesta de Nacionalistas

"...a los gritos de abajo los Aráoz y vivas a Don Próspero García se han acantonado en una casa (la de Eusebio Acuña) haciendo fuego durante tres días a la casa de Domingo Aráoz y de Leandro" (Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 17-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

En Famaillá y Lules, el fraude fué más escandalosa. En el primer distrito, Hermenegildo Rodríguez y Eudoro

---

Robles obtuvieron 700 votos y en el segundo, obtuvo Rodríguez más de 200 votos sin tacha. Pero a contar desde esta altura del registro, había como 500 votos por los mismos encabezados por una grosera falsificación que consistía en haber puesto el nombre de un clérigo Zavaleta sobre el de Rodríguez, "...quedando este tan visible que podía leerse perfectamente en los dos registros" (J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Pues bien, la Legislatura desaprobó la elección de Famaillá, donde no había tacha alguna que poner a las actas, y aprobó la elección de Lules, donde fué electo el Clérigo Zavaleta, es decir, "...ha canonizado el fraude y ha fabricado diputado al Clérigo" (Ibídem).

<sup>6500</sup> El ex-Senador Nacional José Posse, observaba que la Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha "...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo objeto a los Diputados Nacionales" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6501</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6502</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6503</sup> Ibídem.

<sup>6504</sup> Ibídem.

<sup>6505</sup> Ibídem. Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención a la provincia, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,

"...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>6506</sup> Bravo, 1995, 11.

<sup>6507</sup> Arredondo intentó volver a la política de la Banda Oriental, lugar donde había nacido, invadiendo en Febrero de 1886 la República Uruguay, pero fué vencido en los palmares del Quebracho, Paysandú, el 31-III-1886 (Fernández Saldaña, 1945, 693).

<sup>6508</sup> Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Ver De Marco (1964).

<sup>6509</sup> cuñado de Bernardo de Irigoyen.

<sup>6510</sup> Barraquero, 1926, 482.

<sup>6511</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

<sup>6512</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

<sup>6513</sup> Hijo de Mariano Santillán y de Tomasa Gondra, hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra, y concuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra. Era casado con Delia Palacio (Cutolo, VI, 668).

<sup>6514</sup> Corvalán había sufrido en tiempos de Ibarra y Taboada cárceles sin nombre. El Diputado Nacional Manuel Gorostiaga manifestaba en la Cámara que el Coronel Máximo Paz "...ha visto con sus propios ojos, como yo con los míos, las señales dejadas por las barras de grillos en las piernas de uno de los jóvenes más distinguidos de la provincia de Santiago del Estero, y de los más conocidos en el seno de esta ciudad: el Dr. Don José María Corvalán" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-V-1886, p.33). Corbalán era primo de los Diputados Nacionales Dámaso Palacio Achával y Benjamín Palacio Santillán.

<sup>6515</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).

- 
- <sup>6516</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>6517</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>6518</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>6519</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).
- <sup>6520</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).
- <sup>6521</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>6522</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>6523</sup> Prefecto Lugones a J. Roca, Santiago del Estero, 12-VIII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5.
- <sup>6524</sup> *Ibidem*.
- <sup>6525</sup> *Ibidem*.
- <sup>6526</sup> Concuñado del Gobernador y Senador Nacional Gregorio Santillán Gondra.
- <sup>6527</sup> "...Absalón Rojas fué sostenedor de Zavalía, después se disculpó diciendo que había sido engañado por Olascoaga" (Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882, AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.21).
- <sup>6528</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.21).
- <sup>6529</sup> "...A mi no me gustó la elección de Gallo porque tenía en su vida antecedentes que abogaban poco en su favor, pero las cosas se presentaron de tal manera que no era posible evitar su elección sino cometiendo actos de violencia que me hicieron temer un conflicto" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 9-XII-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8).
- <sup>6530</sup> Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).
- <sup>6531</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 9-XII-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8).
- <sup>6532</sup> José Cortés Funes a J. Roca, Córdoba, 21-II-1876, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.3.
- <sup>6533</sup> Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 12-IX-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).
- <sup>6534</sup> La facción Irigoyenista era un desprendimiento del Partido Republicano, apoyada en Buenos Aires por Leandro Alem (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64).
- <sup>6535</sup> Gerónimo Cortés Funes, los Achával, etc.
- <sup>6536</sup> Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5).
- <sup>6537</sup> Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5).
- <sup>6538</sup> Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5).
- <sup>6539</sup> "...La empresa del Ferrocarril del Norte, la Administración de Correos, el Telégrafo, el Observatorio y la Universidad, con el Juzgado Federal y sus empleados, todo es oposición, todo es Laspiur" (Ismael Galíndez a J. Roca, Córdoba, 31-I-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).
- <sup>6540</sup> Juárez Celman, a J. Roca, Córdoba, 29-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

---

<sup>6541</sup> omitido por Galván Moreno.

<sup>6542</sup> ver Bischoff, 1994, 129.

<sup>6543</sup> Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>6544</sup> Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>6545</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 72.

<sup>6546</sup> En realidad esta Liga remonta su origen a 1871 (ver Bonaudo y Sonzogni, 1992, 80).

<sup>6547</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 16; y Rostow, 1975, 739-740.

<sup>6548</sup> Cortés Conde, 1989, 213. Es interesante señalar que aún para 1882 la anarquía monetaria continuaba. Tiburcio Benegas le escribía a Roca que "...He visto que de Tucumán piden al Gobierno Nacional respecto de la chirola boliviana una resolución análoga a la que justicieramente tomó con respecto a los cuatros bolivianos y me ocurre que si alguna resolución toma el gobierno podría hacerla extensiva a las chirolas chilenas, que como sabés es la moneda circulante en esta Provincia y la de San Luis. Una resolución del Gobierno que fijase tantos centavos a cada pieza conocida por chirola, según juzgase conveniente, que a mi juicio correspondería 16 centavos nacionales me habilitaría para efectuar el cambio de sistema en esta provincia en muy poco tiempo, allanando así al Gobierno Nacional, sin mayor quebranto para él, el sinnúmero de dificultades y trastornos que consiguientemente se producen al ofrecerse un cambio de sistema monetario. Me he permitido hacerte esta indicación en el deseo de cooperar en mi pequeña esfera a tus patrióticos esfuerzos para dotar al país de una moneda nacional poniendo así término a la anarquía monetaria en que por tantos años hemos vivido" (T. Benegas a J. Roca, Mendoza, 24-XII-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28).

<sup>6549</sup> para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 5.

<sup>6550</sup> ver Moore, 1966.

<sup>6551</sup> Esta era consistió de cuatro etapas. En la primer etapa, que nació con los hechos armados ocurridos en Barracas y Belgrano (1880) y concluyó con la elección de Juárez Celman (1886), los conflictos se dirimieron principalmente a través de las asonadas, el fraude electoral, la lucha parlamentaria, la negociación internotabiliar, la reivindicaciones agrarias, estudiantiles y eclesiásticas, y las levas de contingentes y excepcionalmente a través del crimen político (caso de San Juan). En una segunda fase que nació con la elección de Juárez Celman (1886) y culminó con la Revolución del 90, los conflictos se volvieron a zanjar principalmente a través del motín militar y la intriga palaciega (Tucumán, Córdoba y Mendoza) y secundariamente a través del sufragio. En una tercera fase, que nació con la Revolución del 90 y culminó con el inicio del segundo gobierno de Roca los conflictos se volvieron a intentar resolver principalmente a través de la violencia (San Luis, Santa Fé, Buenos Aires, Corrientes) y secundariamente a través del sufragio, la lucha parlamentaria y la negociación internotabiliar. Y en una cuarta y última fase que principió con el segundo gobierno de Roca (1898) y concluyó con la Ley Sáenz Peña (1912), los conflictos se volvieron a ajustar principalmente a través del sufragio y las luchas obreras y parlamentarias. En la combinación de cuestiones que dispararon estos conflictos se destacaron en esta última etapa de la segunda contraola regresiva aquellas interpelaciones a la necesaria circulación de las elites, que podemos circunscribir en la cuestión de las incompatibilidades y el nepotismo.

<sup>6552</sup> Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; Stewart, 1993; y Prelooker, 1996, 55.

<sup>6553</sup> que correspondía al dominio del Imperialismo Británico.

<sup>6554</sup> En el cuarto ciclo de Rivarola (1936), la idea del sufragio libre, iniciada en 1881, estalla en la Revolución del 90 (Rivarola, 1936, 157).

<sup>6555</sup> que se prolonga hasta 1940.

---

<sup>6556</sup> Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; Stewart, 1993; y Prelooker, 1996, 55.

<sup>6557</sup> Sobre la amenaza alemana al continente, ver Small, 1972. Sobre el imperio informal en la Argentina, ver Thompson, 1992; y Hopkins, 1994. Para la controversia sobre la tesis de Gallagher y Robinson (1953), ver Louis, 1976. Ver también Renouvin, 1990, Libro III, Cap. XIX. Para el caso Argentino, ver Haas, 1980, 363; y para el caso Uruguayo, ver Winn, 1973. Jones (1980), fundado en Stokes (1969), refuta las tesis acerca del imperialismo informal de Thompson, 1992; y niega que Gran Bretaña haya jugado en Argentina un rol imperialista.

<sup>6558</sup> Sobre los prejuicios racistas con referencia al indígena en las obras de Agustín Alvarez, Carlos Octavio Bunge y Manuel Ugarte, ver Ricaurte Soler, 1969; Terán, 1987; y Svampa, 1994, 116. Acerca de la distinción, tomada de Arendt (1982), entre el antisemitismo político y el religioso, ver Lefort, 1985; y 1990, 86. Como expresión literaria del antisemitismo que comenzó a asomar a partir de los grandes empréstitos concertados en la Argentina para financiar la Guerra del Paraguay, la Campaña del Desierto y una infinidad de obras públicas en la década del 80, y que desembocaron en la Revolución del 90, ver la novela de Julián Martel titulada *La Bolsa*, reseñada en Viñas, 1995, 175-190. Una excepción a la regla la constituye la conducta del Juez Tedín (ver al respecto Amadeo, 1972; y Bravo Tedín, 1981). El principal mecanismo para retener la fuerza de trabajo conquistada en las guerras coloniales consistía en una suerte de esclavitud conocida como confinamiento. Sobre la mano de obra de plantación en Tucumán (Argentina), ver García Soriano, 1969; y Guy, 1978. Sobre el confinamiento de los indios Pampas y Ranqueles en los ingenios de azúcar del Tucumán, ver Depetris, 1992.

<sup>6559</sup> ver Alvarez, 1916, 1919. Sobre las virtudes colonizadoras manifestadas en las memorias y crónicas de viajes de Lucio V. Mansilla, Estanislao Zavallos y Ezequiel Ramos Mexía, ver Montergous, 1985, capítulos I y III; y Viñas, 1995, capítulo III. Refiriéndose a quienes se habían opuesto a la entrega de la tierra pública, el Diputado Nacional Joaquín Anchorena decía en 1912: "...Los que estudian las cuestiones por encima, por el mapa, por todo ese régimen chico del papel pintado, decían: Señor, los terratenientes se acaparan toda la tierra de la Pampa. ¡No; no se acaparan nada, señor presidente! Es el progreso que se ha llevado todo. La razón es evidente: el que compró la tierra barata, el que tuvo el buen tino de ir a visitarla, sospechó que podía hacerla productiva. ¿mediante que? Mediante un nuevo capital que incorporase a esas tierras. Cuanto más capital iba invirtiendo, más iba conociendo el resultado que le daba. Llegó un momento en que, complacido de la adquisición, pudo ver como he visto yo, hace veinticinco años, esa Pampa bruta, si así puede decirse, cubierta en toda su extensión por un pastizal enorme, llena de pequeños huecos, su superficie de arena, convertirse en un campo de vegetación como estamos acostumbrados a ver los que hemos nacido en los bordes del Río de la Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, convertirse en espléndidos alfalfares como los que tiene actualmente la Pampa Central y que constituyen una verdadera riqueza para el país. ¿Como se ha hecho ese emporio de riqueza? ¿Como se han hecho esos capitales? ¿como se ha hecho todo eso? Enajenando tierra, porque si no se hubiese enajenado, no habría nada en ella. Yo quiero que me resuelvan este hecho, porque no hay efecto sin causa: si no se produce la venta, que es la causa, para que vaya el trabajo, nunca se producirá el efecto, el resultado del trabajo mismo. No, señor presidente: en esta materia estamos completamente equivocados, y lo peor es que el trastorno llega a la prensa y a todas partes, y a todos los que creen que los que compran tierra se la van a llevar a alguna parte. No señor: las tierras son del país y se van a quedar aquí (Risas). Si las tierras las compra quien puede comprarlas, de lo único que tiene que preocuparse el legislador es de que el que las haya comprado las entregue al trabajo" (Exposición del Diputado Nacional Joaquín Anchorena, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1912, III, Reunión n.75, 14-III-1913, p.868). Y en cuanto al capital con que se enriquecía el valor de la tierra, el Diputado Nacional Nicolás Repetto, revelaba en 1933, una carta que le había sido dirigida, donde se identificaba a los importadores de la maquinaria agrícola, que mediante el crédito externo "...facilitaba la tarea de extraer oro con el arado: Agar Cross, Hasenclever, Raggio, Drabble, Moore y Tudor, Drysdale, Polledo, Ashworth, Della Zoppa, Mignaqui, Hirschberg...Cientos y cientos como estos iniciaron pequeños comercios y merced al crédito que otorgaban, porque también lo gozaban, introdujeron al país cosas que no conocíamos y las llevaron al campo, ayudaron al colono dándole crédito hasta cinco años seguidos y crearon fortuna para sí y para los demás" (exposición del Diputado Nacional Nicolás Repetto, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1933, V, Reunión n.60, 28 y 29 de septiembre de 1933, p.751).

<sup>6560</sup> Con respecto a la educación y las virtudes transmitidas a los hijos, Alejandro Paz, un hermano del periodista José C. Paz, e hijo de Ezequiel Paz, le confesaba en 1887 a su primo hermano Julio A. Roca, seguramente haciendo referencia a la educación de su hijo Julito, que "...no has tenido poca suerte, porque todos los hombres que ocupan altas posiciones en el país tienen una estrella fatal para sus hijos cuando estos

---

se educan o se desarrollan durante el apogeo de aquellos. Los Paz, los Lavalle, los Mitre, etc. no han transmitido gran cosa de ellos a su prole. La confianza en un porvenir asegurado a la sombra de la gloria de los padres, la poca atención que estos prestan a su educación absorbidos como están por la cosa pública, y las lisonjas que les prodigan especulativamente los que figuran alrededor de todo hombre de alta influencia hacen que los niños se engrían, desdeñan el estudio y creen innecesario los méritos propios para sobrevivir y formar una posición propia" (Alejandro Paz a J. A. Roca, París, 30-I-1887, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>6561</sup> sistema al que Gibson (1996) aplica la noción de "defecto genético", acuñada por Panebianco (1988).

<sup>6562</sup> sobre el crimen político en San Juan y el arbitraje presidencial, permítaseme citar a Saguier, 1997c; y sobre la conflictividad interna versus la externa y la cuestión Santiagueña, ver Saguier, 1997d.

<sup>6563</sup> ver Balestra, 1971; Oddone, 1930; Marichal, 1984; Regalsky, 1986, 1987, 1988a y 1988b; Gilbert, 1996; y Saguier, 1996d.

<sup>6564</sup> ver Martínez de Codes, 1986, capítulo VI. Estanislao Zevallos, Joaquín V. González, Lucio V. López, Miguel Cané, Martín García Merou, Eduardo Wilde, etc. Para una introducción biográfica a estos autores, ver Prieto, 1982; Montergous, 1985; y Svampa, 1994, 89-96.

<sup>6565</sup> para conocer su naturaleza de gozne entre la ciudad y la campaña, ver Tío Vallejo, 1997, 23, 30 y 39.

<sup>6566</sup> para ahorrar repeticiones permítaseme citar a Saguier, 1995d, 1996a y 1996b.

<sup>6567</sup> ver las opiniones científicas acerca del poder del carisma, en Panebianco, 1988, 299.

<sup>6568</sup> permítaseme citar a Saguier, 1997c y 1997d.

<sup>6569</sup> "...Ayer fué Corrientes, vino en seguida Entre Ríos y hoy es Santiago el que cae o caerá bajo la espada del Cónsul que aspira a no dividir el poder, sin duda para ser César a lo menos por seis años !Error, funesto error. No hay gobierno posible sin opinión y sin resortes legales y nada mas que su personalidad y su poder está dejando en pié al Gral. Roca. ¿Para qué esta política unipersonal preñada de peligros, que descontenta a sus amigos y lo que es peor los inutiliza ya para el día en que le hagan falta? Si quiere poder ¿no tiene el más alto, el más amplio, el que le dá la ley, aquél con que lo ha armado la Constitución? ¿Se hace falta levantar el machete de oscuros soldados a la palabra desautorizada de periodistas mercenarios para afianzar su poder, que nadie le disputa, que todos queremos robustecer el terreno de la ley" (J. M. Olmedo a J. Celman, Buenos Aires, 26-VIII-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11).

<sup>6570</sup> hermano del Ministro de Hacienda de la Nación, que se candidateó a Presidente en 1884, y luego fuera Presidente de la República Victorino de la Plaza.

<sup>6571</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6572</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6573</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6574</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6575</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6576</sup> Hijo del que fuera en 1829 el Gobernador José Tomás Albarracín y de Tomasa Godoy, casado con Isabel Porven. Era sobrino segundo de Doña Paula Albarracín de Sarmiento, la madre de Domingo F.

---

Sarmiento.

<sup>6577</sup> José V. Moreno a D. Rocha, San Juan, 9-III-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214).

<sup>6578</sup> "...Roca ignora que aquel amigo no tiene ningún contingente en ella, ni opinión capaz siquiera de disimular el pecado que se cometería dándole a este pueblo un Gobernante como él" (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17). Aparentemente Moyano era de origen humilde, aunque logró formar una sólida fortuna (Frias, 1985, 220 y 230).

<sup>6579</sup> político Tucumano, seguramente pariente del Gobernador Próspero García.

<sup>6580</sup> José V. García a Juárez Celman, 31-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>6581</sup> *Ibidem*.

<sup>6582</sup> *Ibidem*.

<sup>6583</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 217.

<sup>6584</sup> *La Patria Argentina*, 10-II-1883, n.1501.

<sup>6585</sup> Simón de Iriondo a J. Roca, Santa Fé, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23).

<sup>6586</sup> Para las décadas que siguen a la del 70, y hasta fines de siglo, de ocho gobernadores que tuvo Santa Fé entre 1870 y 1895 todos, salvo uno, provenían de familias con destacada actuación en la vida política y social de la primera mitad del siglo XIX. Ello dio lugar a que en 1874 el diario *La Capital*, de Rosario, señalara que Simón de Iriondo dejaba la provincia "...con desorden por haber gobernado con su círculo y familia"; y que doce años después, en 1886, el mismo órgano periodístico insistiera en similar acusación aconsejando que era "...tiempo que los destinos de la provincia dejen de ser patrimonio de una familia o de una camarilla" (*La Capital*, 3-III-1874 y 9-II-1886, citado por Gallo, 1984, 363).

<sup>6587</sup> Botana, 1977, 105.

<sup>6588</sup> Hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candiotti Larramendi, casado con Mercedes Zavalla Comas, padre del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y de los Diputados Nacionales Urbano Ramón Iriondo Zavalla y José María Iriondo Zavalla, suegro de Bernardo de Irigoyen Olascoaga, cuñado del Gobernador Canónigo Manuel María Zaballa Comas, del Vice-Gobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y del Diputado Nacional Leónidas Zavalla Comas, y con cuñado del Gobernador de Córdoba Manuel Demetrio Pizarro Leanes.

<sup>6589</sup> Díaz de Molina, 1972, II, 414.

<sup>6590</sup> "...Hoy considero al Dr. Pujato un cero en la política Santafesina, no tanto por sus antecedentes equívocos, cuanto porque me consta que dicho Sr. no cuenta al presente con ninguna influencia, que sea dicho de paso, jamás la ha tenido personalmente, sirviendo cuando mas de pantalla a las aspiraciones de D. Deolindo Muñoz que tampoco cuenta aquí con ningún partido y al contrario es mal querido por lo general, debido a la conducta que observó, durante el Gobierno provisorio de Pujato" (Antenor Pita a Victorino de la Plaza, Rosario, 5-VII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>6591</sup> Eusebio Gómez a J. Roca, Rosario, 13-XII-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>6592</sup> nacido en Santa Fé en 1851, hijo de José Toribio de Gálvez Quintana, y de Margarita Siburu, y casado con Eulogia Rosas y Torres Echenique (Cutolo, III, 190). Era cuñado del Senador Nacional José Elías Gollán, y del legislador provincial Zenón Martínez y Cabanillas, y suegro del embajador Víctor Lazcano y Gorostiaga.

<sup>6593</sup> Manuel Fernández a Victorino de la Plaza, Santa Fé, 26-VIII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la

---

Plaza, Leg.392).

<sup>6594</sup> Manuel Fernández a Victorino de la Plaza, Santa Fé, 26-VIII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392).

<sup>6595</sup> José R. Espíndola a Juárez Celman, Santa Fé, 17-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.14.

<sup>6596</sup> hijo de Pedro Aldao Candioti y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Tiburcio y Ricardo Aldao; concuñado del Gobernador José María Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1855/56/67); y padre del Gobernador Ricardo Aldao Nicolorich (GP.1924-28).

<sup>6597</sup> Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 14-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>6598</sup> tuvo la iniciativa de fundar en 1867 el Banco Comercial de Santa Fé (Ensinck, 1971, 48). Era sobrino político del Gobernador Patricio Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1862-63) y padre o tío del Diputado Nacional Agustín Cabal (DN.1894-00). Según Bonaudo y Sonzogni era yerno de Patricio Cullen (Bonaudo y Sonzogni, 1992, 87).

<sup>6599</sup> segundo del célebre Comandante Patricio Rodríguez.

<sup>6600</sup> residente en el Arroyo Ludueña, al sud de la provincia de Santa Fé.

<sup>6601</sup> Pedro Marisano a Mariano Cabal, Rosario, 28-VI-1885; y Pedro Marisano a Dardo Rocha, Rosario, 20-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>6602</sup> A las órdenes del Gral. Eduardo Racedo reprimió la Revolución del 80 en el combate de Puente Olivera y Puente Alsina, y fué Jefe Político del Departamento de San Lorenzo (Cutolo, II, 338).

<sup>6603</sup> Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 14-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39.

<sup>6604</sup> para su biografía, ver Montergous, 1985; y Paredes, 1997.

<sup>6605</sup> Rato de Sambucetti, 1980, 429.

<sup>6606</sup> E. Zeballos a Roca, 17-?-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.48.

<sup>6607</sup> Camilo Aldao a Juárez Celman, Rosario, 8-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20.

<sup>6608</sup> cuñado del Gobernador José Bernardo Iturraspe.

<sup>6609</sup> J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>6610</sup> José Cabot a D. Rocha, Rosario, 5-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>6611</sup> "...ha sido y es el alma puede decirse así, de los movimientos y adhesiones en la campaña desde la Candelaria hasta San Lorenzo. Jóven aún relativamente, querido del gaucho por su carácter llano, de gran prestigio y activo y bravo como que él solo peleó hace pocos días a la partida policial del Comisario Jeneral Almada, hiriendo de un balazo al hermano de este que la comandaba, no ha descansado un momento desde que aquí se trató de formar opinión en pro de la candidatura de Vd." (J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>6612</sup> J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>6613</sup> José Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>6614</sup> cuñado de Simón de Iriondo. Cuando asumió la gobernación, su salud estaba extremadamente deteriorada. "...No recuerdo si en *El Figaro* o *El Pueblo* (diarios de esa) que ha afirmado, combatiendo la situación de Santa Fé, que Zavalla, está tan inhabilitado que ni siquiera firma él, sino que otro lo hace, sin saberlo quizá el

---

mismo Zavalla. Para creer que pueda ser cierto, aquello de que Zavalla no firma, y que otros gobiernan por su cuenta me fundo en la nota que le adjunto; fijese en ella y verá, que el nombre de Zavalla ha sido puesto al pié, por el mismo que escribía la nota, es el mismo carácter de letra, la misma tinta (el Ministro ha firmado con otra distinta). Para convencerme de la semejanza que salta a primera vista, pedí la opinión de un taquígrafo inteligente y persona de toda confianza, y dice que no hay duda, que la nota y firma de Zavalla está escrita por la misma mano" (M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>6615</sup> Deolindo Muñoz a J. Roca, Santa Fé, 22-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>6616</sup> Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>6617</sup> Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>6618</sup> E. Villafañe a V. de la Plaza, Paraná, 9-IX-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392).

<sup>6619</sup> Pompeyo Pizarro a V. de la Plaza, Rosario, 25-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

<sup>6620</sup> Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 25-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

<sup>6621</sup> Gualberto Escalera y Zuviría a J. Celman, Rosario, 16-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>6622</sup> Escalera y Zuviría a J. Celman, Rosario, 17-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>6623</sup> Escalera y Zuviría a J. Celman, Rosario, 17-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>6624</sup> José Antenor Pita a Victorino de la Plaza, Rosario, 31-III-1885 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

<sup>6625</sup> nacido en 1862, hijo de Benito Freyre Rodríguez del Fresno, y de Manuela Iturraspe Freyre; nieto paterno de José Freyre de Andrade y de Manuela Rodríguez del Fresno; y nieto materno de José Buenaventura de Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno (Cutolo, I, 265; y III, 147; y Calvo, I, 265). Era cuñado del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y primo político del Diputado Nacional Octavio Grandoli Correa.

<sup>6626</sup> José R. Espíndola a J. Celman, Santa Fé, 27-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.21).

<sup>6627</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>6628</sup> Rodolfo Freyre a Juárez Celman, Santa Fé, 11-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>6629</sup> Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 5-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

<sup>6630</sup> Ovidio Lagos a Juárez Celman, Rosario, 17-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>6631</sup> Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 5-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

<sup>6632</sup> Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 5-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

<sup>6633</sup> sobrino del Gral. Aniceto Latorre.

<sup>6634</sup> líder del Club del Pueblo.

---

<sup>6635</sup> Eusebio Gómez a J. Roca, Buenos Aires, 29-I-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>6636</sup> N.N. a J. Roca, Rosario, II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.49).

<sup>6637</sup> Se incorporó a la Logia Masónica Docente en 1882. Era hermano del líder católico Pedro Goyena (Vidaurreta, 1962-67, 271).

<sup>6638</sup> Acerca de la Intervención a Corrientes del Dr. Miguel Goyena, ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 25-IX-1880, 34a. Sesión ordinaria, pp. 476-485.

<sup>6639</sup> había sido Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel Victorio Gelabert. Era hijo del Presidente de la Confederación Santiago Derqui.

<sup>6640</sup> Es sorprendente que ningún Diccionario Histórico, ni el de Piccirilli ni el de Cutolo, traigan una biografía de este Gobernador. Era hijo de Francisco Gallino y de Petrona Arévalo de San Miguel; y marido sucesivamente de Francisca Ayala, Magdalena Bastos, y Jacinta Monsalvo (Fernández de Burzaco, III, 116).

<sup>6641</sup> Gómez, 1931, 90. Rafael Gallino era hermano de Antonio Gallino, marido de Luisa Pujol, y suegro de Manuel V. Ezcurra, y de Federico Melchert (Fernández de Burzaco, III, 116).

<sup>6642</sup> En Diciembre de 1880 Rudecindo Roca le escribía a su hermano que: "...en vista de que Gallino no puede gobernar sin Derqui y su partido de hombres más o menos letrados, conviene anticiparse a una nueva reconciliación escribiendo al uno y al otro en el sentido de la unión y por mi conducto, para que como mediador, los reconcilie y deje a Derqui así grato hacia tí por haberle dado, con su influencia participación en el poder" (Rudecindo Roca a J. A. Roca, Corrientes, 29-XII-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13). Y en Noviembre de 1880, José María Gutiérrez escribía en La Patria Argentina un artículo titulado "Entre dos Gallinos", donde a propósito de Derqui decía: "El Dr. Derqui se encuentra entre dos Gallinos. Si vá a Corrientes los revuelos y puazos de Gallino Gobernador, lo persiguen. Si viene a Buenos Aires, aquí está Gallino sin gobierno, pero también armado de buenas púas para recibirlo en las antesalas del gobierno. Y así se encuentra el pobre pretendiente, recorriendo una línea que tiene como puntos extremos dos Gallinos. Y con un mundo de ambición en la cabeza marcha con un ojo al levante y otro al poniente, a la par que los dos en la silla que se le escapa y la que le corcobeó ya una vez. Ayer Gallino II en nombre de Gallino I y el Dr. Derqui andante, tuvieron una larga conferencia con el presidente y el Ministerio de la Guerra respecto a los asuntos referentes a la torta presupuestaria de Corrientes, en la que masca a dos carrillos Gallino I con la feroz resolución de tener en perpetuo y desesperante ayuno al Dr. Derqui, resolución que lleva el rabo de hacer 'una hecatombe de cadáveres y lutos' derquistas en caso necesario, esto es, llegado el momento en que haya peligro de dividir la tajada" (La Patria Argentina (Buenos Aires, 3-XI-1880).

<sup>6643</sup> Evaristo Moreno a Victorino de la Plaza, Concordia, 26-I-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, 5-1-3).

<sup>6644</sup> Antonio Gallino le relataba a Roca que su elección para Gobernador de Corrientes, que tuvo lugar el 9 de Diciembre de 1880 por unanimidad de electores "...dan la prueba de una opinión uniformada, que a pesar de los recursos de que se ha valido el Dr. Derqui, hasta invocando la protección e influencia del Gobierno Nacional, no ha podido desviarla, y hoy mucho menos cuando ya está descubierta su farsa" (Antonio B. Gallino a J. Roca, Corrientes, 12-XII-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13).

<sup>6645</sup> Con la separación del Dr. Gondra, el Gobernador Antonio B. Gallino le confiesa a Roca que "...ante las causas bastante graves e inmorales que la produjo, todos los amigos se me habían acercado insinuándome la candidatura de mi hermano en reemplazo del Dr. Gondra, a lo que no tuve inconveniente acceder, tanto porque la candidatura de este ya encontraba una valla insuperable en la opinión pública, cuanto porque en mi hermano le enviaría unos partidarios definidos, cuyas opiniones respecto a la política nacional son acentuadas y V.E. tendría en él un amigo decidido que estaría en toda ocasión de su parte" (Antonio B. Gallino a J. Roca, XII-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.20).

<sup>6646</sup> Castello, 1984, 465.

<sup>6647</sup> Gómez, 1931, 90 y 92.

---

<sup>6648</sup> miembro de la logia masónica Constante Unión, de la ciudad de Corrientes (Lappas, 1971).

<sup>6649</sup> Castello, 1991, 424.

<sup>6650</sup> En Corrientes, el Coronel Rudecindo Roca fué al Gobernador Gallino, lo que más luego fué en Córdoba Marcos Juárez al Gobernador Olmos.

<sup>6651</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151.

<sup>6652</sup> El Senador Rafael Igarzábal argumentó en el Senado de la Nación que la Legislatura de Corrientes debió haber obrado en 1882 de la misma forma en que lo hiciera quince años antes, en 1868, en el caso del Gobernador Evaristo López (1866-68), rechazando la renuncia porque el Gobernador secuestrado no estaba en condiciones de renunciar libremente. A la cita de Igarzábal replicó el Senador Miguel Victorio Gelabert argumentando que mientras que los que violentaron al Gobernador Antonio Gallino en 1882 eran asesinos los que lo hicieron con Evaristo López no lo eran. A lo que Igarzábal refutó que él no hacía cuestiones personales sino legales (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. Sesión ordinaria, p.152).

<sup>6653</sup> Exposición del Diputado Nacional Carlos de la Vega, Diario de Sesiones, 1909, I, Reunión n.22, 11 de Agosto de 1909, p.629.

<sup>6654</sup> El Senador Rafael Igarzábal revelaba que esta conducta "...se ha hecho ya una costumbre, porque ya hay más de diez o doce casos en la República, de asustar a los Gobernadores para obligarlos a renunciar". Igarzábal recordaba la estoica actitud de resistencia adoptada en 1858 por el Gobernador de Córdoba Mariano Fraguero (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151).

<sup>6655</sup> el gallinicidio era una típica acción inconstitucional y de visos terroristas, operada por el gobierno central, consistente en arrancar la renuncia de Gobernadores y funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, amenazas y alarmas.

<sup>6656</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 9-V-1882, 4a. Reunión, 1a. Sesión Ordinaria, pp.22-23; 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. Sesión Ordinaria, pp.148-159; y 27-VI-1882, 21a. Reunión, 18a. Sesión Ordinaria, pp.160-165.

<sup>6657</sup> **La Patria Argentina**, 10-II-1883, n.1501, "El Manifiesto de un partido". Sigue el documento: "...Así quedó fijado para la historia, el reflejo de aquel atentado sin ejemplo cuyo último toque fué dado por el Gral. Roca en persona, trasladándose al local de los sucesos a bordo de un buque de guerra de la nación en donde pisaba, sin saber si tenía la vida segura, el Gobernador Gallino a quien se había colocado el puñal al pecho para hacerle firmar al mismo tiempo su renuncia y un pagaré. Más tarde, era el Gobernador Iriondo, el amigo y sostenedor de la candidatura del Gral. Roca para Presidente de la República, a cuyo triunfo dió el voto de los electores oficiales de la provincia de Santa Fé, quien revelaba al país las pretensiones del Presidente de gobernar todas y cada una de las provincias que la componen en la parte de la soberanía no delegada y en todas las cuestiones locales de carácter electoral especialmente. Al Dr. Iriondo siguió el Dr. Gallo, Gobernador de Santiago, el que declaró en un manifiesto bajo su firma, que se trataba de voltearlo del gobierno por no haber acatado las imposiciones del Presidente de la República que le eran hechas, para que elevase hasta el primer cargo público de la provincia, usando de todos los medios oficiales a su alcance, al instrumento que mas de su saber encontraba el Gral. Roca" (La Patria Argentina, 10-II-1883, n.1501). Y pensar que sólo siete años antes, en 1876, en San Luis, el entonces Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. Julio A. Roca, admirador del Diputado Onésimo Leguizamón, le manifestaba al Diputado Nacional Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como el caso del Comandante Moreno, candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad que residen a solicitar puestos públicos" (J. Roca a Víctor Lucero, Río IV, 28-VIII-1876, reprod. en Lucero, 1931, 163).

<sup>6658</sup> Gómez, 1931, 96.

<sup>6659</sup> M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 17-VII-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.24).

---

<sup>6660</sup> Castello, 1984, 466. Según Derqui: los descontentos "...los siete u ocho que Rudecindo cree son muchos, no tienen razón, para desempeñar la comedia que representan, cebados en la inmoralidad que entronizó Gallino, no les gusta la regularidad, quieren que se escluyan los viejos, es decir a los hombres de representación, de fortuna, de posición social, y política,...mejor que no se peleen por puestos que por el contrario cuesta hacerles aceptar, nulidades como el conocido Garrido quieren ser mariscales, los que tienen procesos pendientes por arreadores de vacas ajenas, quieren sobreponerse a gente sin tacha, se les tapa sus fechorías se les deja y hasta se les lleva a puestos, por una condescendencia que podrá calificarse mal, quieren mas y mas, y para conseguirlo, quieren producir alarma, tomando un nombre que valga, toman el de Rudecindo porque no tienen entre ellos uno que pueda servirles de bandera" (M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 20-VI-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6661</sup> para la biografía de este interesante personaje correntino, ver Gómez, 1944.

<sup>6662</sup> Gómez, 1931, 99; Noble, 1960, 371; y Rato de Sambucetti, 1980, 425 y 426.

<sup>6663</sup> Castello, 1991, 469.

<sup>6664</sup> Como prueba del clima social que se vivía, el periodista santiaguense Carlos M. Maldonado le escribía a Rocha que "...en el acto de proclamación...no teníamos un solo individuo de poncho, ni sucio o mal vestido y cosa que no se vé con frecuencia aquí muchos miembros del Comité y otros amigos, estaban de frac, corbata y guante blanco" (Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 30-IX-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Y en el acto de proclamación del Coronel Quinteros, Luis F. Aráoz le refería a Roca que "...todos los apellidos han estado representados en esa reunión. Hasta de la campaña, desde Medinas han venido en tren espreso más de 300 personas. Los manifestantes ocupaban como dos cuerdas y media descollando las galeras, que son hoy el diploma de decencia en el lenguaje actual" (Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 23-VIII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.54).

<sup>6665</sup> hijo de José Antelo y Petrona González (Cutolo, I, 175).

<sup>6666</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 208. Balleto y Marcos Funes, a juicio de Racedo, "...son muy poca cosa con relación al primero [Ruiz]...como hombre plumista, quiero decir periodistas, tienen necesidad de comer y se alquilan para elucubrar la 'idea'" (E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 25-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32).

<sup>6667</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 214.

<sup>6668</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 217.

<sup>6669</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 219. Con motivo de la cuestión de Santiago en el Senado, Francisco Caracciolo Figueroa le manifestaba a Juárez Celman que algunos senadores "...entre ellos Febre, han traicionado con su voto al Presidente, se principia a producir una reacción y a deslindarse la situación de cada uno de los Congresales tanto en lo que se refiere al presente como al futuro. Reacción muy favorable para los intereses y propósitos que nosotros perseguimos; pues esto ha hecho caer en la cuenta que es necesario estar organizados y no desquiciados como estábamos antes, que cada uno obraba por su cuenta. Estos actos últimos han hecho caer en cuenta que no era mucha la mayoría que tenía el Presidente y con la cual podía contar para los asuntos en que tuviera interés nuestro partido, pero a la vez se ha patentizado que cuando se ha tenido que darse en las Cámaras una batalla importante, como es la que nos ocupa ahora del Banco Nacional, hemos estado ayudando al Presidente todos los amigos de Vd" (Francisco Caracciolo Figueroa a M. Juárez Celman, Buenos Aires, 19-IX-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10).

<sup>6670</sup> Rato de Sambucetti, 1995, 222.

<sup>6671</sup> Gobernador del Territorio de La Pampa, Interventor en Corrientes cuando el alzamiento del Coronel Toledo, y Jefe de las Guardias Nacionales en Entre Ríos en 1893 (Yaben, 1938, I, 385-388).

<sup>6672</sup> semejante a la que emitiera el Ministerio de Instrucción Pública, y la Jefatura de Policía (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 31-V-1882, I, 214).

<sup>6673</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.

---

<sup>6674</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.

<sup>6675</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 6-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). El Gral. Juan Ayala apoyaba las aspiraciones parlamentarias de Justo J. Caraballo (hijo o sobrino del General Oriental Francisco Caraballo), pero fué declarado inhábil "...por falta de edad" (José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). Aparentemente Caraballo insistió, pues el Gobernador Coronel José Francisco Antelo, en carta a Roca, le expresaba que "...elegirlo nuevamente es contrariar esa sanción soberana de la Cámara" (José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). Y respecto a la recomendación de Roca, Antelo tuvo que confesarle que

"...nada puedo hacer en favor de las pretensiones que abriga [Caraballo] de penetrar a todo trance a la Legislatura porque para ello tendría que ponerme en pugna con este cuerpo soberano, y lo que es más falseando por completo la Constitución que exige una edad para ser Diputado que Caravallo no tiene como está probado hasta la evidencia, por mas que él haya pretendido y pretenda demostrar lo contrario, con informaciones falsas, que si algo prueban es la audacia y el cinismo de un jóven que entra recién a la vida pública" (José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>6676</sup> José Francisco Antelo, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.

<sup>6677</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 125.

<sup>6678</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 118.

<sup>6679</sup> "...El Presidente del Club electoral que patrocina esta lista en la ciudad de Paraná, es el gefe político nombrado ad hoc en reemplazo del Sr. Comas, el Sr. Ortiz. Y así como el gefe político es el gefe del Comité electoral, todos los comisarios de policía, todos los comandantes de la guardia nacional de la campaña, se han reunido allí en la lista que constituye este club popular. En Nogoyá y en la Victoria tenemos a los Gefes de la guardia nacional presidiendo los clubs electorales: el coronel De la Cruz Romero, comandante en gefe de la guardia nacional del departamento de Nogoyá, es el Presidente del Comité de ese distrito. En el departamento de Gualaguaychú, es el Presidente del Comité, el comandante en gefe de la guardia nacional. En el departamento del Tala, el comité lo forman el gefe político con los empleados de policía, todos, desde el comisario de órdenes hasta el último gendarme. En el departamento de Colón, el Presidente del Comité es el gefe político y comandante de la división, acompañado por el de la guardia nacional de la campaña, don Federico Franco y el personal de la policía. En Concordia, forman el mismo Comité los gefes de la guardia nacional y de la policía y los demás empleados públicos. En Federación, preside el Comité un gefe que está habituado el Congreso a oír nombrar, y aún a tratar por motivos que le han preocupado. Me basta nombrar al gefe de línea Coronel Guarumba, como Presidente del Comité, para que la Cámara juzgue lo que en ese departamento pasa en materia de libertad electoral" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 120).

<sup>6680</sup> Los diarios "...llegados últimamente de Entre Ríos nos hacen saber que el Gobernador de aquella Provincia, ha empezado a destituir a todos los empleados que están bajo su dependencia. Este gallinicidio de empleados responde a la política del futuro Gobernador Gral. Racedo, impuesto como se sabe por el Héroe No. 2. El delito de estos cientos de empleados es que eran partidarios del que creían que sería Gobernador, el Dr. Febre, y que como se sabe cayó en desgracia del Héroe No.2, por haber transfugado. Muchos de estos empleados que tal vez contra su voluntad magnificaban ser partidarios de Febre, han sido destituidos y puestos en su lugar aquellos que sostienen el candidato oficial de la liga. Las destituciones no se hacen separadamente, sino por reparticiones enteras, todo el mundo a la calle" (*La Patria Argentina*, 25-II-1883, n.1516).

<sup>6681</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 122.

<sup>6682</sup> cuya extensa propiedad, denominada Cupalén, parte del Potrero de San Lorenzo, heredado de los García de Zúñiga, le disputaba el Gobierno sin verdadero interés para la Provincia.

<sup>6683</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28.

---

<sup>6684</sup> Halperín Donghi, 1985, 79.

<sup>6685</sup> Evaristo Moreno a Victorino de la Plaza, Concordia, 17-IX-1883, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.411.

<sup>6686</sup> J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

<sup>6687</sup> J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

<sup>6688</sup> nacido en Paraná en 1852, Secretario privado de Leónidas Echagüe entre 1872 y 1875; en 1873 formó parte de las fuerzas del Cnel. Donato Alvarez contra López Jordán. Era hijo de Luis Leguizamón y Eduarda Ponce.

<sup>6689</sup> Luis Leguizamón a F. Méndez, 16-I-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>6690</sup> Luis Leguizamón a F. Méndez, 16-I-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>6691</sup> Luis Leguizamón a F. Méndez, 16-I-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>6692</sup> Luis Leguizamón a F. Méndez, 16-I-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>6693</sup> donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la pertenencia a una localidad geográfica enfrentado a otra facción movilizada por la característica compartida de la pertenencia a otra localidad.

<sup>6694</sup> ver Urquiza Almandoz, 1991; y 1965, 262 y 270; y Rato de Sambucetti, 1995. A juicio de Racedo, expresado a Roca "...aún en la hipótesis de que los enemigos de la situación hubieran conseguido producir escisiones en el partido esgrimiendo como medio eficaz para conseguir su fin la cuestión capital, no hubiese sido posible dejar de tocar este punto por que de lo contrario, se me hubiera hechado encima la otra costa [del Paraná] que tiene más importancia por su riqueza y numerosa población, pero todo se ha salvado porque se ha manejado la cuestión con tino, comprometiendo a todo el partido mismo, por ser de programa: tenga fe mi amigo Presidente en mi tino, que aún que escaso, coronaré la reforma de la Constitución con la aprobación de la mayoría inmensa de la provincia. No lo dude" (Eduardo Racedo a J. A. Roca, Concepción del Uruguay, 21-V-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>6695</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

<sup>6696</sup> ver Urquiza Almandoz (1965).

<sup>6697</sup> Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de *El Uruguay* y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandó, 1965, II, 380, 532; y III, 257 y 328).

<sup>6698</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

<sup>6699</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

<sup>6700</sup> Emilio Civit a Victorino de la Plaza, Mendoza, 12-III-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>6701</sup> Emilio Civit a Victorino de la Plaza, Mendoza, 12-III-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>6702</sup> José Miguel Segura a J. Roca, Mendoza, 30-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15.

<sup>6703</sup> Joaquín Villanueva a J. Roca, Mendoza, 28-II-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14.

<sup>6704</sup> Según *El Ferrocarril*, Ortega "...es un animal sumamente original, tanto por su forma física como por

---

sus usos, costumbres y régimen de vida, que indudablemente dará al traste con todos los sistemas de clasificación de los naturalistas, y que ni el Gran Cuvier podría clasificarlo. A primera vista parece conejo, pero se diferencia no obstante de este, en sus enormes colmillos y su régimen de alimentación; en vez del alimento vegetal o animal, usa exclusivamente de este último, pues se alimenta puramente de aves, prefiriendo entre estas las de corral, y entre las presas elige la cresta. Pero lo que más va a confundir a los naturalistas para su clasificación es que perteneciendo indudablemente a una especie de conejos por su constitución está cubierto casi completamente de lana exactamente igual a la de las ovejas, pudiendo considerarse también como de esta familia tanto por esta propiedad como por lo sumiso y dócil al amo. Su hocico es ñato y deja ver dos grandes dientes semejantes a los de los roedores, pareciéndose mucho a los de la rata. Con tal retrato no dudamos que el tal gobernante hará roncha en la Capital y tendrá una comitiva constante cada vez que pasee las calles. Vendrá a la Exposición" (*La Patria Argentina*, 16-I-1882, n.1112).

<sup>6705</sup> R. Ortega a J. Roca, Fuerte Cuarta División, 28-XII-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.20.

<sup>6706</sup> Jefe del 5o. de Infantería destacado en el Fuerte Gral. Belgrano, en la frontera norte de Santa Fé; y luego Jefe de la Brigada Norte con asiento en San Lorenzo (Salta). Casó con Rosa Colman (Cutolo, IV, 675).

<sup>6707</sup> nació en 1847 en Capilla del Señor, Jefe Político del Rosario y luego de Rafaela a las ordenes del Interventor Nacional Dr. Baldomero Llerena; y luego Inspector General de Armas de la Provincia; reprimió la Revolución de 1893 bajo el mando del Gral. Liborio Bernal (Cutolo, V, 9).

<sup>6708</sup> R. Ortega a J. Roca, Fuerte Cuarta División, 28-XII-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.20.

<sup>6709</sup> de filiación Rochista (Rato de Sambucetti, 1980, 419).

<sup>6710</sup> Nicolás Villanueva al Cnel. Julio Campos, Mendoza, 30-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.207).

<sup>6711</sup> J. Echevarrieta a José B. Rodríguez, Mendoza, 14-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>6712</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 72.

<sup>6713</sup> ver Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988.

<sup>6714</sup> en el seno de legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y provinciales.

<sup>6715</sup> Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977,1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y Cragnolino, 1986-87.

<sup>6716</sup> Sagarna, 1943; Spalding, 1972; Argacha, 1979; y Saguier, 1996a.

<sup>6717</sup> ver Saguier, 1995f.

<sup>6718</sup> García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d.

<sup>6719</sup> Saguier, 1996b.

<sup>6720</sup> ver Little, 1980 y 1985; Ciafardo, 1990 y 1994; y Mead, 1997.

<sup>6721</sup> para entender estos procesos, ver Buchanan y Tullock (1962).

<sup>6722</sup> El Acuerdo consistía en aceptar la fórmula presidencial proclamada (Mitre-Bernardo de Irigoyen) y en respetar las situaciones provinciales logradas mediante el fraude electoral.

<sup>6723</sup> ver Oddone (1930), Scobie (1964), Mendilaharsu (1986) y Saguier (1996c).

---

<sup>6724</sup> ver la discusión al respecto, en Ferns, 1992.

<sup>6725</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 32. Sin embargo, Lewis (1981) pone en duda a Mandel (1980) sosteniendo que no está definitivamente probado que en la primer parte de la segunda onda larga de Kondratiev (1875-1893) se haya dado una fase de estancamiento y que en la segunda parte (1893-1914) haya acaecido una fase de expansión (Lewis, 1981, 713).

<sup>6726</sup> Suter, 1995, 48.

<sup>6727</sup> Para Parsons (1968) y Baldwin (1971), los conceptos de inflación y deflación de la teoría del dinero se transferían a la teoría del poder y las comunicaciones. Para el impacto de los procesos inflacionarios en la política de América Latina, ver Paldam, 1987.

<sup>6728</sup> ver Panettieri, 1981.

<sup>6729</sup> hijo de Pedro José Frías, (a) "Peque", partidario de la Confederación Argentina.

<sup>6730</sup> el de Jujuy Jorge Zenarruza, de Catamarca José Dulce, de La Rioja Joaquín V. González, de Mendoza Oseas Guiñazú, de San Juan Alejandro Albarracín, de San Luis Mauricio Orellano, de Buenos Aires Julio A. Costa, de Santa Fé Juan M. Cafferata, de Corrientes Antonio I. Ruiz, o de Entre Ríos Sabá J. Hernández.

<sup>6731</sup> Ángel Quirós a Julio A. Roca, Salta, 16-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>6732</sup> Por estar casado con Mercedes Cornejo Castellanos, era primo político del ex-Gobernador Dr. Moisés Oliva, marido de Angela Cornejo Latorre, y del futuro Gobernador Dr. Abrahám Cornejo Peralta.

<sup>6733</sup> hijo de Manuel Ovejero y de Saturnina Zerda y Medina, sobrino del Gobernador Sixto Ovejero, y marido de Dolores Linares Usandivaras. Era cuñado del Gobernador de Salta Luis Linares Usandivaras, y primo hermano de los Gobernadores de Salta David Ovejero González y Avelino Figueroa Ovejero y del Gobernador de Jujuy Daniel Ovejero Tezanos.

<sup>6734</sup> Ángel Quirós a Julio A. Roca, Salta, 10-XII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>6735</sup> *Ibidem*.

<sup>6736</sup> *Ibidem*.

<sup>6737</sup> hijo del Gobernador Juan Nepomuceno Uriburu y de Casiana Castro; marido de Concepción Matorras Navarro; cuñado del Senador Nacional Federico Ibarguren Díaz Niño (SN.1871-80; DN. 1902-06); suegro del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04); y primo hermano de Domingo Güemes Castro, aunque distanciado políticamente.

<sup>6738</sup> Ángel Quirós a Julio A. Roca, Salta, 10-V-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>6739</sup> *Ibidem*.

<sup>6740</sup> *Ibidem*.

<sup>6741</sup> *Ibidem*.

<sup>6742</sup> Hijo del Gobernador Coronel Martín Güemes y Puch y de Adela Güemes y Nadal (Cutolo, V, 212). Era casado con María Isasmendi, y fué con cuñado del Gobernador Abrahám Cornejo Peralta y tío político del que fuera Gobernador y Senador Nacional Robustiano Patrón Costas.

<sup>6743</sup> Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 27-X-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>6744</sup> Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 31-X-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

---

<sup>6745</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 4-II-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6746</sup> corresponsal de *La Tribuna* (Buenos Aires).

<sup>6747</sup> Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-1892 (Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6748</sup> Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-1892 (Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6749</sup> Güemes obstaculizaba la candidatura de Delfín Leguizamón Cobo "...porqué lo ve entregado a Ovejero que representa aquí al Roquismo" (Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-1892, AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6750</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>6751</sup> hijo de Benancio Grande y Hoyos y de Leandra Ovejero y Zerda, sobrino segundo de Sixto y Querubín Ovejero y Zerda, y primo segundo de Ángel M. Ovejero Zerda (Jáuregui, 1976, 132 y 133).

<sup>6752</sup> Ángel M. Ovejero a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>6753</sup> hijo de Francisco Cornejo Figueroa y de Restituta Usandivaras, y cuñado del Gobernador Antonino Díaz Ibarguren. Fué aliado político de Ángel Ovejero.

<sup>6754</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>6755</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>6756</sup> Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6757</sup> eran sus principales accionistas José Antonio Chavarría Saravia, Juan Tomás Frías, Sidney Tamayo Gurruchaga, los Ovejero, los Zerda, los Linares, los Arias, los Cornejo, y los Figueroa.

<sup>6758</sup> Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 1-VI-1894 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.68).

<sup>6759</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6760</sup> *Ibidem*.

<sup>6761</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 19-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6762</sup> primo hermano de los Diputados Nacionales Tte. Cnel. Juan Solá Chavarría (DN.1880-82) y Damián M. Torino Solá (DN.1900-04).

<sup>6763</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 19-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6764</sup> Hijo de José Díaz y de Belisaria Ibarguren, y casado en primeras nupcias con Salustiana Arias Murúa y en segundas nupcias con Mercedes Cornejo Usandivaras. Era sobrino del Juez Dr. Federico Ibarguren, y cuñado de Francisco F. Cornejo Usandivaras, y había sido Jefe de Policía, Ministro de Hacienda en el Gobierno de Frías, Ministro de Gobierno y Hacienda en el Gobierno de Leguizamón, en reemplazo de los Ministros Dávalos y Linares, "...que cayeron a causa de los hechos sangrientos del 4-III-1894" (Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6765</sup> Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 1-V-1894 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.68).

<sup>6766</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6767</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 19-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6768</sup> *Ibidem*.

---

<sup>6769</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Leg.69).

<sup>6770</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Leg.69).

<sup>6771</sup> *Ibíd.*

<sup>6772</sup> *Ibíd.*

<sup>6773</sup> Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 30-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6774</sup> Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 28-XII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.71).

<sup>6775</sup> Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 28-XII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.71).

<sup>6776</sup> Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 28-XII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.71).

<sup>6777</sup> Hijo de Fermín Ferrari y de Rosario Díaz, y casado con Elena Giménez, y cuñado del ex-Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa.

<sup>6778</sup> Exposición del Senador Nacional Francisco Caracciolo Figueroa, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 17-VI-1893, p.154.

<sup>6779</sup> padre del Diputado Nacional Manuel V. Rodríguez Bustamante.

<sup>6780</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 28-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>6781</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 28-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>6782</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 28-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>6783</sup> yerno del Gobernador Francisco Rosa Galíndez y Cubas (GPv.1862/71).

<sup>6784</sup> L. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 7-X-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60.

<sup>6785</sup> L. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 7-X-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60.

<sup>6786</sup> Hijo de Manuel Antonio Figueroa y Sosa y de Romualda Herrera y Acuña, marido de Rosario Ferrari Díaz, hermano del Diputado Nacional Marcos Figueroa Herrera, cuñado de Gustavo Ferrari, padre del Diputado Nacional Alberto F. Figueroa, y primo hermano del Gobernador Manuel Navarro Herrera y del General Octaviano Navarro Herrera. Fué propietario del diario "*El Pueblo*".

<sup>6787</sup> "La intriga consiste en haber reproducido la hoja impresa que le adjunto y en que se daba cuenta de la organización de nuestros elementos, cuidando de poner en lugar del nombre de Moisés Soria, que figura en el texto del acta, el de Gustavo Ferrary" (Francisco Caracciolo Figueroa a Roca, Catamarca, 18-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>6788</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>6789</sup> Ferrari quería designar a su cuñado Francisco Caracciolo Figueroa.

<sup>6790</sup> padre del Presidente de la República Ramón Castillo.

<sup>6791</sup> Bazán, 1992, 218.

<sup>6792</sup> Bazán, 1992, 295. A juicio del Diputado Nacional Rafael Castillo, la revolución triunfó "...porque hubo allí, en el cuartel y la policía, individuos que abrieron las puertas para que entrasen los revolucionarios...Y no voy a decir si hubo mas de treinta dineros, señor presidente, ni menos indicaré quienes recibieron el

---

estipendio, pero sí se que hubo individuos que vendieron su conciencia y fueron traidores; y esos individuos fueron los que habían ayudado con sus pocos elementos a elevar el gobierno de Ferrari, y que estaban en su propia administración" (Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, pp.153 y 179-180).

<sup>6793</sup> hijo de Ramón Rosa Avellaneda y de Asunción Salas, marido de Dolores de la Vega, y primo hermano del Diputado Nacional Lídoro Avellaneda Villegas (Cutolo, I, 270).

<sup>6794</sup> Félix T. Avellaneda a Julio A. Roca, Catamarca, 21-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>6795</sup> Noble, 1960, 436.

<sup>6796</sup> Diputado Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1892, 7a sesión ordinaria, p.202.

<sup>6797</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 13-VI-1892, 7a sesión ordinaria, p.184.

<sup>6798</sup> pariente del Gobernador Gustavo Ferrari.

<sup>6799</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.193.

<sup>6800</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.193.

<sup>6801</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>6802</sup> ver Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 1893, pp.151-157.

<sup>6803</sup> El Diputado Nacional Rafael Castillo se preguntaba si la conducta partidista desplegada en las elecciones de 1892 no estaría ligada a la circunstancia que

"...el gobernador de la provincia [Gustavo Ferrari], ligado por vínculos de parentesco al señor diputado electo [Juan José Ibáñez] y al juez federal [Francisco Caracciolo Figueroa], lo mismo que el juez federal, ligado también por vínculos de parentesco al señor diputado electo" (Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1892, 6a sesión ordinaria, p.170).

<sup>6804</sup> El Jefe de Policía de Catamarca Antonio Rivera, por el hecho de haber detenido a dos gendarmes Santiagueños en la estación Frías, correspondiente a Santiago del Estero, fue tomado preso en la estación Recreo, territorio de Catamarca, por el Jefe de Policía de Santiago del Estero, Eudoro Gallo, y llevado a Santiago donde fue puesto a disposición del Juez Federal sito en dicha provincia. A su vez, el Jefe de Policía de Catamarca, Eudoro Gallo, fue procesado por el Juez Federal sito en Catamarca. El Juez Federal de Catamarca "...dicta auto de prisión y exhorta al Juez de Santiago para que se le remita. El Juez Federal de Santiago se declara competente para conocer [la causa], y le niega al de Catamarca la facultad de dictar auto de prisión contra el Jefe de Policía de Santiago, y este Jefe de Policía se pasea en las calles de Santiago mientras el de Catamarca hace 71 días que está preso; y el Juez no se ha pronunciado ni sobre el pedido de libertad, de excarcelación bajo fianza, ni siquiera sobre la incompetencia para conocer de los delitos que se le atribuyen al Señor Rivera, Jefe de Policía de Catamarca". La consecuencia de este litigio de competencias jurisdiccionales cruzadas, era para Figueroa, de una derivación lógica, "...si es competente [el Juez Federal de Santiago] para conocer de los delitos cometidos en territorio Catamarqueño, por el Jefe de Policía de Santiago Eudoro Gallo, no lo es para conocer de los cometidos por el Jefe de Policía de Catamarca Antonio Rivera en territorio de Santiago" (Exposición del Senador Nacional Francisco Caracciolo Figueroa, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 17-VI-1893, p.152-153).

<sup>6805</sup> hijo natural de Gila Escalante. Se cuenta que ya adolescente, su padre quiso reconocerlo y darle su apellido, a lo cual Wenceslao Escalante se negó, conservando el apellido de su madre (versión libre de Carlos Jáuregui Rueda).

---

<sup>6806</sup> Allende, 1964, 400.

<sup>6807</sup> para su biografía, ver Montergous, 1985; y Roldán, 1993.

<sup>6808</sup> nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396).

<sup>6809</sup> Hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien había descollado en la defensa de La Rioja contra el sitio del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa González, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro (Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era tío del Diputado Nacional José María Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos, y primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera.

<sup>6810</sup> Joaquín V. González a Julio A. Roca, La Rioja, 28-II-1891 (AGN, Archivo Roca, Leg.62).

<sup>6811</sup> Gob. Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 14-VI-1894 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.68).

<sup>6812</sup> *Ibidem*.

<sup>6813</sup> *Ibidem*.

<sup>6814</sup> padre del Candidato a Gobernador Florentín Barros Meléndez (Cand./Gobern.).

<sup>6815</sup> padre del historiador César Reyes.

<sup>6816</sup> Guillermo San Román, La Rioja, 22-II-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6817</sup> hijo de Aurelio Carreño y de Restituta Villafañe y Ortiz de Ocampo; sobrino del Gobernador Domingo A. Villafañe; y cuñado de los Gobernadores Joaquín V. González y Wenceslao Frías (Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 30-III-1895, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6818</sup> Reyes, 1916, 133-134.

<sup>6819</sup> Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 22-II-1895, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69.

<sup>6820</sup> Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 30-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6821</sup> Tomás Vera a Julio A. Roca, La Rioja, 8-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6822</sup> Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 30-IV-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6823</sup> Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 30-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>6824</sup> *Ibidem*.

<sup>6825</sup> Leandro Alem, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 31-VII-1895, 24a. Sesión Ordinaria, p.470.

<sup>6826</sup> hyermano del Diputado Provincial David Guñazú Estrella (DP/SRF.1889-91).

<sup>6827</sup> *Ibidem*.

<sup>6828</sup> *Ibidem*.

<sup>6829</sup> tío del Gobernador Emilio Civit Corvalán (GP.1898; 1907-10); y primo del Diputado Nacional Rodolfo

---

M. Zapata Segura (DN.1890-94).

<sup>6830</sup> Francisco Uriburu a Julio A. Roca, Mendoza, 29-I-1891 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6831</sup> *Ibídem*.

<sup>6832</sup> *Ibídem*.

<sup>6833</sup> *Ibídem*.

<sup>6834</sup> sobrino del Senador y Diputado Provincial Manuel Cruz Videla González (SP/SRF.1896-04); y padre del Gobernador Carlos Washington Lencinas Peacock (GP.1924-28); y de los Diputados Nacionales José Hipólito y Rafael Néstor Lencinas Peacock; (DN.1920-28) (DN.1926-30) (Fuente: Morales Guñazú, 1939, 309).

<sup>6835</sup> hijo de Agustín Videla y de Manuela Correas Espínola, y hermano del Diputado Provincial Daniel Videla Correas (DN.1874-78; DP/Gillén.1866). Los Diputados provinciales Carlos Videla Correas (DP/JN.1866; DP/JN.1870); y Eusebio Videla Correas (DP.1863) eran también hermanos pero eran hijos del Diputado Provincial José María Videla y de Magdalena Correas.

<sup>6836</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 16-XII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>6837</sup> *Ibídem*.

<sup>6838</sup> Suegro del que luego fuera Gobernador de Mendoza Emilio Civit.

<sup>6839</sup> Francisco Uriburu a Julio A. Roca, Mendoza, 9-II-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6840</sup> *Ibídem*.

<sup>6841</sup> *Ibídem*.

<sup>6842</sup> *Ibídem*.

<sup>6843</sup> *Ibídem*.

<sup>6844</sup> *Ibídem*.

<sup>6845</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 18-IV-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.63).

<sup>6846</sup> *Ibídem*.

<sup>6847</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 28-X-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>6848</sup> Funes, 1951, II, 3.

<sup>6849</sup> Funes, 1951, II, 9. Era sobrino de los Gobernadores de Salta Evaristo Uriburu y Hoyos (GD.1831-37); Vicente Uriburu y Hoyos, (GP.1831); Pedro Uriburu y Hoyos (GP.1850; DN.1877); y Juan Nepomuceno Uriburu y Hoyos (GP.1861); primo hermano de los Gobernadores Napoleón Uriburu Arenales (GP.1892, Formosa); del Presidente de la República José Evaristo Uriburu y Arenales; y de los Gobernadores Pedro José Uriburu Arias (GP.1874, Tucumán); Cnel. José María Uriburu Arias (Formosa, 1900); y Pío Uriburu Castro (GP.1898-1901).

<sup>6850</sup> Francisco Uriburu a Julio A. Roca, Mendoza, 29-I-1891 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6851</sup> *Ibídem*.

<sup>6852</sup> *Ibídem*.

---

<sup>6853</sup> *Ibídem.*

<sup>6854</sup> Mariano de Vedia a Julio A. Roca, Mendoza, 3-II-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6855</sup> *Ibídem.*

<sup>6856</sup> Francisco Uriburu a Julio A. Roca, Mendoza, 9-II-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6857</sup> ex-Jefe de Policía, de antigua filiación Mitrista; y suegro de Luis Florencio Pérez Colman.

<sup>6858</sup> Oseas Guiñazú a Julio A. Roca, Mendoza, 2-X-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>6859</sup> Olguín, 1961, 82.

<sup>6860</sup> *Ibídem.*

<sup>6861</sup> un dirigente de filiación Orteguista, electo Diputado por Malargue, pero cuyo diploma fué rechazado por la alianza liberal-radical acuerdista (Lacoste, 1990, I, 107; y 1995, 42 y 179).

<sup>6862</sup> A. o L. Labal a Julio A. Roca, Mendoza, 13-IV-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>6863</sup> *Ibídem.*

<sup>6864</sup> *Ibídem.*

<sup>6865</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 7-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>6866</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 71.

<sup>6867</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 71.

<sup>6868</sup> probablemente se trate de Salvador Alfonso, Presidente de la Cruz Roja de Tucumán, quien combatiera el cólera en 1886, y Director de *La Razón* de Tucumán, que con su reaparición en 1890 le hizo decir a El Orden que era "...el periodista que ha cambiado de color político tantas veces como pelos tiene en la cabeza" (García Soriano, 1972, 24); o bien posiblemente de Francisco Alfonso, cronista de *El Progreso*, diario de Córdoba, dirigido por Javier Lazcano Colodrero (Bischoff, 1994, 114).

<sup>6869</sup> sobrino carnal del Gobernador Nicolás Villanueva García, (GP.1867).

<sup>6870</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 13-XI-1897, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 76.

<sup>6871</sup> Oseas Guiñazú a M. Juárez Celman, Mendoza, 29-IV-1990 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.29).

<sup>6872</sup> Oseas Guiñazú a M. Juárez Celman, Mendoza, 29-IV-1990 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.29).

<sup>6873</sup> hijo del Gobernador Francisco Civit Godoy (GP.1873); y sobrino del Senador Nacional Martín Zapata Coria (SN.1854-60).

<sup>6874</sup> Emilio Civit a Julio A. Roca, Mendoza, 26-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>6875</sup> Cesáreo Ordóñez a J. Roca, Mendoza, 11-VIII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.64).

<sup>6876</sup> Cesáreo Ordóñez a J. Roca, Mendoza, 11-VIII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.64).

<sup>6877</sup> Videla, 1962-90, VI, 456.

---

<sup>6878</sup> Fue el cabecilla del partido liberal Mitrista Sanjuanino, y estuvo comprometido en el atentado que costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Era hijo de Domingo Ignacio Morón y Navarro y de Paula Cortínez y Oro; cuñado del ex-Gobernador Santiago Lloveras (GI, 1864/57), y yerno del ex-Gobernador Zacarías A. Yanzi Orozco (GP.1852).

<sup>6879</sup> *La Prensa*, 4-IX-1893.

<sup>6880</sup> *La Prensa*, 4-IX-1893.

<sup>6881</sup> cuñado del Gobernador Zoilo Concha Villegas (GP.1881-84 y 1887-88) (Cutolo, V, 178).

<sup>6882</sup> hijo de José de la Cruz Videla y de Margarita Poblet, y marido de Ercilia Bengolea. Era medio primo hermano del Dr. Teófilo Saa (Cutolo, VII, 607).

<sup>6883</sup> Diputado Víctor S. Guinazú, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 8a sesión ordinaria, 15-VI-1892, p.245.

<sup>6884</sup> Diputado Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.218.

<sup>6885</sup> Diputado Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.218.

<sup>6886</sup> hijo de quien fuera el Jefe de la Revolución de los Colorados en 1866, Coronel Juan Saa (a) Lanza Seca. Para más detalles, ver Follari, 1995, cap.IX.

<sup>6887</sup> Díaz de Molina, 1972, II, 650.

<sup>6888</sup> En 1887 fué Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Para más detalles sobre su actuación en San Luis, ver Follari, 1995, Cap.XII.

<sup>6889</sup> era el mismo que había sido derrocado de la gobernación de San Luis con motivo de su participación en la batalla de Santa Rosa, en que el Mitrisismo de Cuyo a las órdenes del Gral. Arredondo fue derrotado por el Gral. Roca.

<sup>6890</sup> "San Luis. Antecedentes de la cuestión", *La Prensa*, 9-XI-1896, p.3.

<sup>6891</sup> "San Luis. Antecedentes de la cuestión", *La Prensa*, 9-XI-1896, p.3.

<sup>6892</sup> "San Luis. Antecedentes de la cuestión", *La Prensa*, 9-XI-1896, p.3.

<sup>6893</sup> hermano de los Gobernadores Toribio y Jerónimo Mendoza Lucero (GP.1878); cuñado del Gobernador Adeodato Berrondo Aberastain (GP.1897-1900); y padre del Gobernador Toribio Mendoza Gutiérrez (GP.1933-34).

<sup>6894</sup> Eriberto Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 27-I-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>6895</sup> "San Luis. Antecedentes de la cuestión", *La Prensa*, 9-XI-1896, p.3.

<sup>6896</sup> "San Luis. Antecedentes de la cuestión", *La Prensa*, 9-XI-1896, p.3.

<sup>6897</sup> "Esperando la Intervención", *El Diario*, 30-X-1896

<sup>6898</sup> "...no obstante su formidable nombre de potencia anfibia: marítima por lo de monitor, y terrestre por lo de Maza, ha sido puesto a la sombra por su protagonista el Gobernador Lindor Quiroga, que ha abordado al Sr. Monitor embicándolo en la jefatura de policía. El gobernador de repuesto, como paciente ciudadano, al que se ha metido en honduras y pellejerías de las que él es inocente, pues es un simple figurante sacado a la escena por exigencias de la representación, ha resultado no tener ninguna de las calidades de avería que

---

suponen su bélico nombre de pila y su apellido" ("La Intervención. Tragi-Comedia Puntana", *El Diario*, 31-X-1896).

<sup>6899</sup> era hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; y hermano del Diputado Nacional Mauricio Daract.

<sup>6900</sup> *El Diario*, 3-XI-1896.

<sup>6901</sup> *El Diario*, 3-XI-1896.

<sup>6902</sup> ya había actuado en 1893 como Secretario en la intervención a Corrientes, llevada a cabo por el Dr. Leopoldo Basavilvaso.

<sup>6903</sup> La Prensa, 21-VIII-1890.

<sup>6904</sup> José Gálvez a Julio A. Roca, Santa Fé, 25-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>6905</sup> *Ibidem*.

<sup>6906</sup> *Ibidem*.

<sup>6907</sup> Nicasio Oroño c/ su cuñado Camilo Aldao, s/liquidación de sociedad de capital e industria para contratar la proveeduría del Ejército del Gobierno de la Confederación, Fallos de la Corte Suprema, Causa LXXV, t.VIII, 1875, p.450-452; Nicasio Oroño c/ José Ramón Aldao p/rendición de cuentas, Causa CL, t.IX, 1877, p.301-303; Causa XLVIII, 1885, t.XIX, p.182-183; Causa CXVII, 1888, v.34, 223-226; Dr. Manuel M. Zavalla c/ Domingo Cullen, s/tierras en el paraje de Ascochinga, Causa XIX, 1889, v.33, 58-61; José Iturraspe c/su sobrino José Freire, s/justificación y cobro al Gobierno Nacional del valor de los perjuicios causados en sus bienes de campo, Causa LVIII, t.I, 1871, p.311-316; y José Iturraspe, Cónsul Oriental y Vice-Cónsul de Portugal en Santa Fé c/ Petrona Candioti de Iriondo, Causa CXXIII, t. X, 1877, p.383-386;

<sup>6908</sup> régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de etnia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

<sup>6909</sup> donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la pertenencia a una localidad geográfica enfrentado a otra facción movilizada por la característica compartida de la pertenencia a otra localidad.

<sup>6910</sup> especulador de tierras en Paraguay (Caballero Aquino, 1985, 175).

<sup>6911</sup> Gregorio Torres a Julio A. Roca, Buenos Aires, 3-X-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>6912</sup> hijo de Laurentino Candioti y de Tomasa Quintana, nieto paterno de Nicolás Candioti y Micaela Manuela Frutos, padre del embajador Alberto María Candioti (AGN, Archivo Candioti, Legajo 2, Carpeta 10, Arbol Genealógico de Candioti). A juzgar por la ausencia de datos que se poseen, es muy probable que Nicolás Candioti fuera hijo natural de Francisco Antonio Candioti o de un hermano cura. De ahí la desvinculación de Mariano Candioti con la oligarquía santafesina procedente del clan de los Rodríguez del Fresno. Sin embargo, su vinculación con la oligarquía santafesina procedía por su madre, Tomasa Quintana, prima hermana de Toribio Gálvez y Quintana, y por tanto tía segunda del Gobernador José Gálvez Siburu (AGN, Archivo Candioti, Legajo 2, Carpeta 10, Arbol Genealógico de Candioti; y Martínez Gálvez, 1955, 90).

<sup>6913</sup> ver Passarelli, 1973 y 1980.

<sup>6914</sup> ver De Marco (h), 1993.

<sup>6915</sup> ver Sommariva, 1929-31, II, 244; Noble, 1960, 444; Etchepareborda, 1968; Passarelli, 1980; Wilde, 1985; Bonaudo, Cragolino y Sonzogni, 1989-90; y De Marco (h), 1993.

---

<sup>6916</sup> Juan Terrosa a Julio A. Roca, Santa Fé, 11-V-1891 (AGN, Archivo Roca, 11-V-1891 (AGN, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>6917</sup> *Ibíd.*

<sup>6918</sup> Sobre partidos, pactos y acuerdos políticos en la historia de Corrientes, ver Harvey, 2002.

<sup>6919</sup> ver Córdoba Alsina, 1970.

<sup>6920</sup> Mantilla, 1972, 325.

<sup>6921</sup> Mantilla, 1972, 325.

<sup>6922</sup> Mantilla, 1972, 325; y Allende, 1964, 399. Ver también *El Diario*, del 18 de Agosto al 2 de Septiembre de 1893.

<sup>6923</sup> apoyado por los Secretarios Dr. Norberto Piñero y Rodolfo Rivarola, ambos historiadores, que actuaron como sus Ministros de Gobierno y de Hacienda. Basavilbaso había sido Fiscal de Estado en 1873, Camarista entre 1875 y 1884, Decano de la Facultad de Derecho en 1881 y entre 1886 y 1906 Rector de la Universidad de Buenos Aires.

<sup>6924</sup> Mantilla, 1972, 325.

<sup>6925</sup> hijo del Gobernador Miguel Virasoro Corrales (GI.1848); sobrino de los gobernadores José Antonio y Benjamín Virasoro; y primo hermano del Diputado Nacional Evaristo Pérez Virasoro (DN.1910-22).

<sup>6926</sup> Fernández Saldaña, 1945, 693 y 902; Cutolo, V, 73; y Castello, 1991, 489. Cuatro años antes, en octubre de 1891, reprimió al mando de fuerzas leales al gobierno Autonomista de Antonio I. Ruiz el levantamiento popular producido en Saladas, más conocido como "La Masacre de Saladas" (Castello, 1991, 475); y dos años más tarde, en marzo de 1897, participó conjuntamente con Diego Lamas en una revolución en tierra Uruguaya desembarcando en Colonia, desde la Argentina, en combinación con el caudillo blanco Aparicio Saravia (Fernández Saldaña, 1945, 1164).

<sup>6927</sup> sobrino del que fuera Gobernador de Santa Fé Juan Pablo López (a) "Mascarilla", hermanastro del Brigadier Estanislao López.

<sup>6928</sup> Antonio Fragueiro a J. Roca, Paraná, 21-VII-1890 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>6929</sup> Antonio Fragueiro a J. Roca, Paraná, 21-VII-1890 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>6930</sup> primo hermano de los Senadores y Diputados Nacionales Enrique y Alejandro Carbó Ortiz (GP.1903-07).

<sup>6931</sup> C. M. Zavalla a J. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.80).

<sup>6932</sup> C. M. Zavalla a J. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.80).

<sup>6933</sup> *El Diario*, 16 al 29 de marzo de 1900.

<sup>6934</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 72.

<sup>6935</sup> ver Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988.

<sup>6936</sup> en el seno de legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y provinciales.

<sup>6937</sup> Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977,1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y

---

Cragolino, 1986-87.

<sup>6938</sup> Sagarna, 1943; Spalding, 1972; Argacha, 1979; y Saguier, 1996a.

<sup>6939</sup> ver Saguier, 1995f.

<sup>6940</sup> García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d.

<sup>6941</sup> Saguier, 1996b.

<sup>6942</sup> ver Little, 1980 y 1985; Ciafardo, 1990 y 1994; y Mead, 1997.

<sup>6943</sup> Felstiner, 1976, 58-80; y Domínguez, 1985, 223.

<sup>6944</sup> Felstiner, 1983, 154-180; y Mires, 1988, 70-78.

<sup>6945</sup> Ossorio y Florit, 1968, 261-263.

<sup>6946</sup> Botana, 1977, 161.

<sup>6947</sup> Bourricaud, 1966, 22.

<sup>6948</sup> Felstiner, 1976, 66.

<sup>6949</sup> Miller, 1988, 563.

<sup>6950</sup> Fals Borda, 1970-71.

<sup>6951</sup> Trindade, 1986, 144; y Wolf y Hansen, 1967, 168-179.

<sup>6952</sup> para la llamada izquierda nacional, los montoneros "...constituían la expresión de la lucha de clases del campesinado proletario contra la oligarquía terrateniente opresora, pre-capitalista, de corte saladeril, portuaria y feudal, etc." (Oliver, 1969, 28).

<sup>6953</sup> para las disputas militares recurrentes en América Latina, ver Hensel, 1994. Por Primer Guerra de la Triple Alianza entendemos aquella que culminó en Caseros (1852) como producto de la coalición formada entre el estado de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil.

<sup>6954</sup> El General Bugeuad, que conquistó Argelia para Francia, había aprendido de sus lecturas sobre el General Skobelev y la conquista rusa del Cáucaso (Gottmann, 1968, 187). Sobre la conquista rusa del Cáucaso, ver Becker, 1878; y Morgan, 1994. Sin embargo, la presencia de armas logísticas para construir fortificaciones, canales, caminos y murallas en las propias legiones romanas, nos indicarían que el General ruso Skobelev no habría inventado nada, y que mucho de lo que impartió habría sido tomado de Belisario y los generales bizantinos (Sobre las armas logísticas en las legiones romanas, ver Luttwak, 1976, citado en Mann, I, 395).

<sup>6955</sup> Sommariva, 1929-1931, 298.

<sup>6956</sup> Palcos, 1963, 111; y Hardoy, 1993, 42.

<sup>6957</sup> Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Rufino de Elizalde, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 28-IX-1868, p.638.

<sup>6958</sup> ver Cunietti-Ferrando (1989) y Prado Robles (1995).

<sup>6959</sup> citado en Ensínck, 1971, 41.

<sup>6960</sup> citado en Ensínck, 1971, 44.

---

<sup>6961</sup> Chiaramonte, 1969, 184.

<sup>6962</sup> Thompson y Zuk, 1982, 623.

<sup>6963</sup> hermano del Diputado Nacional Emilio Ferreyra y Alvarez Argüello (DN.1862-66) y del Diputado Provincial Froilán Ferreyra y Alvarez Argüello (DP.1864-65); y padre del Diputado Provincial Daniel Ferreyra y Ramallo (DP.1882-90).

<sup>6964</sup> bajo el mando de Alejo Carmen Guzmán.

<sup>6965</sup> Frías, 1979, 103. Mateo Luque era hijo de Hilario de Luque y de Fortunata Cordero, cuñado del Diputado Nacional Emilio Ferreyra Alvarez, y marido de Ignacia Aldao (Frías, 1979, 105). Su mujer Ignacia Aldao era hija de José María Aldao Igarzábal y de Teresa Pérez de Bulnes y Funes; y sobrina segunda de los Gobernadores Santafesinos Tiburcio, Ricardo y Camilo Aldao Rodríguez del Fresno.

<sup>6966</sup> el mismo que luego participó del asesinato del Gral. Urquiza. Ver Frías, 1964-65.

<sup>6967</sup> hijo de Juan Agustín Roca y Barquin y de Severa de Allende y Martínez; y suegro de Nicolás Granada, y de Miguel Olmos y Cabanillas (Lascano Colodrero, I, 412).

<sup>6968</sup> Bischoff, 1995, 272. El Senador Joaquín Granel, en una sesión del Senado manifestó "...repugnancia hacia la conducta del Gobierno, que ha arrastrado su dignidad, aprobando la conducta del General [Julián] Martínez en los sucesos de Córdoba. Los tratados con Luengo de una parte, y de otra la Nación representada por el Ministro de la Guerra, son la parte prominente de la conducta del General Martínez en su Comisión a Córdoba. Después, el Sr. Ministro es nombrado delegado de Luengo, acepta el puesto y se presenta al ejército que estaba a las puertas de Córdoba mandado por el Gral. Conesa y el Gobernador Luque, a que se le reconozca como tal delegado de Luengo que había resignado en su persona el mando de la provincia". Y luego el Sr. Ministro, mas "...por temor al peligro que corría el Comandante Obligado y su batallón que por la vida de los presos', como lo dice en su nota, manda una, dos, tres, mil veces a dicho Comandante y al Coronel Agüero que se retiren y que entreguen 500 fusiles mas a Luengo, para devolver los que tomó la Nación a la provincia" (El Progreso [Córdoba], Sábado 22-IX-1867, n.19).

<sup>6969</sup> Noble, 1960, 162.

<sup>6970</sup> Noble, 1960, 113.

<sup>6971</sup> Bischoff, 1995, 273.

<sup>6972</sup> primo hermano de los Videla Correas y los Videla Castillo.

<sup>6973</sup> Hijo del Capitán José Elías Rodríguez y de María Nicolasa Domínguez, y nieto de Manuel Antonio Rodríguez. Era casado con Demófila Jurado, y fué padre del Gobernador de San Luis Benigno Rodríguez Jurado (Cutolo, VI, 273 y 322).

<sup>6974</sup> Sommariva, 1931, I, 254; Masini Calderón, 1967; y Pino Domínguez, 1961, 224-232. Por haberse solidarizado con la revolución, el Juez de Sección Dr. Juan Palma fué sometido a juicio político (Sesión Especial de la Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 1867, pp. VI-XCIV).

<sup>6975</sup> Lacoste, 1995, 93.

<sup>6976</sup> Lacoste, 1995, 94.

<sup>6977</sup> Martínez, 1979, 111. Para reforzar esta denuncia, Rodríguez citaba el caso de la Legislatura, donde de un total de veinticinco miembros, veintiún legisladores pertenecían a una misma familia; así como el caso del poder judicial, cuyos miembros se hallaban emparentados con el Gobernador (Melitón Arroyo) y con los Ministros del Poder Ejecutivo (Ministro de Gobierno: Francisco Civit y Consejeros de Gobierno: Carlos González, Nicomedes García, Nicolás A. Villanueva e Hilario Correa; Jefe de Policía: Deoclesio García) (Masini Calderón, 1967, 210). De acuerdo con Funes (1942), en 1866 fueron designados como Jefe de

---

Policía: Don Joaquín Villanueva; como Camaristas suplentes: Don Hilario Correas y Don Exequiel García; como Juez de Letras en lo Civil: Don Joaquín de Rosas; como Juez del Crimen: Don Blas Vargas; como Asesor de los Juzgados: Don Pedro J. Anzorena; como Fiscal Público: Don Modesto Sánchez; como Juez General de Aguas: Don Francisco Regueira; como Juez de Minas: Don Felipe Correa; y Protomédico: Dr. Pablo Villanueva (Funes, 1942, 79-80). Aparentemente, la denuncia tuvo un impacto efectista, pero faltaba a la verdad, porque de un pormenorizado análisis genealógico de la composición familiar de dicha Legislatura, he podido comprobar que, de un total de doce legisladores sobre los cuales se cuenta con información genealógica, a la familia García pertenecieron sólo cinco legisladores, a la familia Villanueva cuatro, y a la familia Videla otros cuatro (ver Apéndice I). En otras palabras, no existía una sola familia que monopolizara la mayor parte de los cargos públicos, sino que éstos se hallaban repartidos oligopólicamente entre varios clanes familiares. El rechazo que esta realidad provocara en Rodríguez habría obedecido a que por su origen puntano, y pese a su matrimonio, nunca fué plenamente aceptado por la elite mendocina.

<sup>6978</sup> El primer combate celebrado en dicho lugar, denominado de Las Leñas, ocurrió en 1825, en oportunidad en que el ex-Gobernador Salvador María del Carril invadió San Juan desde Mendoza (Videla, 1990, III, Cap.XI, Secc.IV, 647-664). En el segundo combate celebrado en la Rinconada del Pocito, el Gobernador Antonino Aberastain fue ajusticiado por las tropas al mando del Coronel Puntano Juan Saa, "Lanza Seca", enviadas en 1861 por el entonces Presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui (Videla, 1990, t.IV, Cap.X, secc.III, pp. 643-666);

<sup>6979</sup> hijo del Dr. José Rudecindo Rojo y de Jacinta Angulo, hermano de Tadeo Rojo, y primo hermano del Ministro Guillermo Rawson (Cutolo, VI, 348).

<sup>6980</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.VI, Secc.IV, p.517-519.

<sup>6981</sup> hijo de José Godoy Oro y de Francisca de la Rosa, y primo hermano del Gobernador José M. del Carril, nietos ambos del fundador de la facción beata Francisco Antonio Vicentelo de la Rosa. Pertenecía a lo que se denominaba la facción beata opuesta a los marranos.

<sup>6982</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.IX. Era hijo de Pedro Carril y de Clara de la Rosa y Torres, sobrino de Salvador María del Carril y primo hermano del Gobernador Ruperto Godoy. Pertenecía a lo que se denominaba la facción beata opuesta a los marranos.

<sup>6983</sup> Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142.

<sup>6984</sup> marido de Austina Díaz de la Peña, hija de Salvador Díaz de la Peña y de Francisca X. Ramírez (Vilgré La Madrid, 1977, 306).

<sup>6985</sup> Brunello, 1944, 15-29; citado por Cutolo, IV, 480.

<sup>6986</sup> En su exilio en Santiago del Estero, Maubecín trabajó de mayoral de una mensajería. Años después volvió a Catamarca donde estableció un taller de joyería, dedicándose también a la odontología (Brunello, 1944, 15-29).

<sup>6987</sup> En la sesión del Senado Nacional donde se debatió la intervención a Catamarca, el Senador Angel Aurelio Navarro declaró: "...Si un gobernador arbitrario, audaz, tiránico, se perpetúa en el gobierno o quiere sostenerse más allá de lo que la Constitución le permite, si oprime a los ciudadanos y los aprisiona o los destierra, valiéndose de un círculo de aventureros para sofocar todas las libertades y perpetuarse más y más en el poder, hasta que al fin el pueblo llegase a armarse para derrocar a ese tirano, ¿habría de ir el gobierno nacional a reponer a ese tirano? No, señor, ese gobernador no podría reponerse; sería autorizar la revolución, sería autorizar el despotismo, la arbitrariedad, sería autorizar la violencia y el fraude con que un hombre se apodera del poder público para perpetuarse en él; eso sí que sería entronizar la tiranía y la arbitrariedad, que es lo que se ha querido evitar al sancionar la Constitución y las leyes" (Senador Angel A. Navarro, Senado Nacional, 28-VIII-1866, 44a. Reunión, 41a. Sesión ordinaria, p.410).

<sup>6988</sup> Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142.

---

<sup>6989</sup> Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142.

<sup>6990</sup> Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.146.

<sup>6991</sup> "...La presencia de Navarro mandando fuerzas y en perfecta relación con nosotros, es un golpe de muerte no solamente contra la reacción que lo ha atropellado y los suyos que hoy lo aborrecen, sino también contra nuestros ilusos amigos de Buenos Aires, que aceptan cuantos desatinos les presentan nuestros detractores como sucede hoy con la cuestión Tolosa. Declaran a Omill reo de lesa patria y Tolosa más criminal que aquél por sus hechos, es declarado sin oír ni saber lo que pasa, un buen sacerdote" (Manuel Taboada a Próspero García, Campamento Delmonte, 1-VIII-1867, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>6992</sup> Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.143.

<sup>6993</sup> primo hermano del Gobernador Gral. Camilo Rojo Angulo (GP.1864/67); y del Diputado Nacional Tadeo Rojo Angulo (DN.1862-64) (Cutolo, VI, 348).

<sup>6994</sup> Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150.

<sup>6995</sup> Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150.

<sup>6996</sup> La Opinión Pública (Córdoba), Miércoles, 4-II-1863, año II, n.31.

<sup>6997</sup> Palcos, 1963, 112.

<sup>6998</sup> Evaristo Carriego, "La Reección es un crimen", El Liberal (Tucumán), 23-III-1864, n.227.

<sup>6999</sup> nacido en Corrientes, hijo natural del Coronel Miguel Virasoro; y marido de Juana Romero (Cutolo, IV, 437).

<sup>7000</sup> natural de Goya. Era el mismo carismático caudillo que diez años después tuvo un rol destacadísimo en la revolución liberal de 1878, que le costó la vida.

<sup>7001</sup> Sommariva, 1929, I, 332-342; Duarte, 1974, cap. VI; Halperin Donghi, 1985b, 55-57; y Castello, 1991, 424. El caso de López fué aludido por el Senador Nacional Rafael Igarzábal, en oportunidad de discutirse la intervención a Corrientes, en 1882, para argumentar que la Legislatura de Corrientes debió haber obrado en 1882 de la misma forma en que lo hiciera quince años antes, en 1868, rechazando la renuncia por la circunstancia de que no estaba en condiciones de renunciar libremente. A la argumentación de Igarzábal replicó el Senador Miguel Victorio Gelabert que mientras que los que violentaron al Gobernador Antonio Gallino en 1882 eran asesinos los que lo hicieron con López no lo eran. A lo que Igarzábal refutó que él no hacía cuestiones personales sino legales (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. Sesión ordinaria, p.152).

<sup>7002</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 25-VII-1868, p.184. Era marido de Josefa Derqui y cuñado del Gobernador Manuel Derqui.

<sup>7003</sup> El Senador Rafael Igarzábal recordaba en 1882, con motivo de la propuesta de intervención a Corrientes, la estoica actitud de resistencia adoptada en 1858 por el Gobernador de Córdoba Mariano Fragueiro, al secuestro de que fué objeto (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151). En otro trabajo de este autor también se recuerda el caso del Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley Wilde y su hijo el Subteniente Alfredo Wilde, que se sublevaron contra el gobierno de los Urriburu, hecho ocurrido en Salta en 1864.

<sup>7004</sup> hermano de los Diputados Nacionales Juan E. Torrent (DN. 1862-70) y Luciano Torrent (DN. 1854-58).

---

<sup>7005</sup> Noble, 1960, 231; y Castello, 1991, 426.

<sup>7006</sup> hermano del Gobernador Interino Victorio Torrent.

<sup>7007</sup> célebre batalla donde se derrotó al caudillo Entrerriano Ricardo López Jordán.

<sup>7008</sup> Castello, 1991, 431; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 42.

<sup>7009</sup> Castello, 1991, 432.

<sup>7010</sup> padre del Presidente Gral. Agustín P. Justo.

<sup>7011</sup> alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya. Dicho concepto fué inaugurado en la República Oriental del Uruguay, con el Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado entre Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (González, 1961, 86-94; y Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309). A su vez este Pacto estuvo influido por el ejemplo brindado en 1852 por el Acuerdo de San Nicolás, celebrado entre el Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros, y los Gobernadores Rosistas. Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, la fusión era "...esencialmente institucional, es el anonadamiento del régimen representativo, es la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan Carlos Gómez, *El Nacional* (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 151).

<sup>7012</sup> Castello, 1991, 438.

<sup>7013</sup> llama la atención que este lugar histórico, ubicado en los llanos de La Rioja, donde se definió la Unidad Nacional, no se halla mencionado ni en el Diccionario de Amílcar Rázori ni en la Enciclopedia de Difrieri. Sobre esta batalla y la zamba que recuerda su nombre, ver Gargaro, 1946-48. Para la tradición, merced a la música de esta zamba, las tropas Santiagueñas, Tucumanas y Salteñas, que integraban el ejército nacional comandado por el General Antonino Taboada, transformaron la derrota inminente en triunfo total (ver Alén Lascano, 1971).

<sup>7014</sup> ver Scenna (1972); y León Solís (1981).

<sup>7015</sup> Martiré, 1965, 10.

<sup>7016</sup> ver Oliver, 1969. Es sabido que estas microculturas rurales poseían patrones morales, culturales y comunicacionales muy distintos de aquellos pertenecientes a las elites urbanas. También es interesante observar la existencia de una transferencia de patrones culturales pues el origen familiar de muchos montoneros provenía de los integrantes de la tropa de Facundo Quiroga; y el origen de esta tropa a su vez provenía de los bandoleros del siglo XVIII. La íntima relación de parentesco que se dió entre los integrantes de la Montonera de Facundo Quiroga, de la década de 1820, con los bandoleros de las rebeliones de Fernando Calamucha y Francisco Fernández contra los Jueces Pedáneos, acontecidas en 1794-95, y con los rebelados en Traslasierra en 1774, la da la lista de los presidiarios de 1796, y ciertos recuerdos registrados en las Memorias del General José María Paz. Dicha Lista, reproducida en un próximo trabajo de este autor (Saguié, 1996), revela los mismos apellidos de aquellos que se habían sublevado en 1774: los Cuello, los Quevedo, y los Heredia. Asimismo, prueba el aserto el protagonismo en dichos episodios de una pareja de padre e hijo, Joaquín Güemes Campero, el Asesor de la rebelión de 1774 y Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, y su hijo Manuel Güemes Campero, oficial de Facundo Quiroga en la batalla de Oncativo (José María Paz, *Memorias*, capítulo XVI).

<sup>7017</sup> Hijo del General Miguel Gregorio Dávila y de Prudencia Gordillo, casado con Restituta Izaguirre, y primo hermano de los Gobernadores Cesáreo Dávila Gordillo y Belindo Soaje Dávila.

<sup>7018</sup> nieto materno del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano Colodrero, III, 396).

<sup>7019</sup> Hijo del Gobernador de La Rioja Coronel Nicolás Dávila del Moral y de María Vicenta Gordillo de la

---

Colina, y casado con Elvira Gordillo San Román, hija de Felipe Santiago Gordillo y de Jacoba San Román (Serrano Redonnet, 1942, 44; y Luna, 1989, 70-72).

<sup>7020</sup> a quien acompañaban en ese entonces el Mayor Julio A. Roca y el Teniente Rufino Ortega (Sommariva, 1929-31, 310).

<sup>7021</sup> Sommariva, 1929-1931, 299.

<sup>7022</sup> suegro de Nicolás Carrizo (GP.1862/68/75).

<sup>7023</sup> Sommariva, 1929-31, 313; y Noble, 1960, 191.

<sup>7024</sup> primo de los hermanos Taboada; marido de Melitona Montenegro; y cuñado de Pío y Alfonso Montenegro. Sus cuñados encabezaron las montoneras Taboadistas en la campaña Santiagueña en 1875, con base en el Departamento de Guasayán, donde tenía sus campos. Se suicidó en Noviembre de 1890 por creerse en la ruina, con motivo de la crisis bursátil de ese año (Cutolo, IV, 623).

<sup>7025</sup> Abel Bazán, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 1-IX-1868, p.427.

<sup>7026</sup> hermano del Gobernador Serafin de la Vega y Brizuela (GP.1867/68/75).

<sup>7027</sup> Sommariva, 1929-1931, 302 y 316.

<sup>7028</sup> este clan hizo triunfar en 1868, contra el partido Mitrista, para Presidente a Domingo Faustino Sarmiento, para Gobernador al Dr. José Benjamín de la Vega, y para Diputado Nacional a su hermano el Dr. Serafin de la Vega; en 1874 para Presidente al Dr. Nicolás Avellaneda, para Gobernador a Rubén Ocampo y Dávila, y para Diputado Nacional al Dr. José Benjamín de la Vega; y en 1877 al Sr. Vicente Almandos Almonacid para Gobernador. Con respecto a la Casa Comercial Bazán y Luna, que cumplía el mismo rol que la Casa Molina en Catamarca, el Senador Nacional Absalón Ibarra denunciaba en el Senado de la Nación que: "...los que han empobrecido a La Rioja no son los santiagueños; son los explotadores de sus desgracias, los que desacreditando al Gobierno Nacional, ponían en duda el pago de esos boletos, para comprarlos por nada; y si es preciso, Señor Presidente, lo diré de una vez por todas: que los que han arrancado el pan de la boca de los hambrientos hijos de la desgraciada Rioja, son los Bazán, Carreño, Cabral y otros que han comprado sus boletos de crédito a cargo de la Nación por cuatro reales y cobrado para sí lo que ellos importaban [valor nominal]" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 29-IX-1868, p.646).

<sup>7029</sup> yerno del Senador Nacional Juan A. Barbeito Giménez, (SN.1892-01) (Fuente: Barreiro Ortiz, 1967, 165). Una vez que renunció al Ministerio denunció públicamente la conducta del Gobernador Berrondo.

<sup>7030</sup> ver lista en Masini Calderón, 1967, 43-48; y Riquelme de Lobos, Norma Dolores; y María Cristina Vera de Flachs (1979).

<sup>7031</sup> Levaggi, 1992, 328.

<sup>7032</sup> para Vélez Sársfield el mecanismo de la internada de los gobernadores en el Senado no difería del régimen de gobernadores vitalicios vigente durante el Rosismo (Dalmacio Vélez Sársfield, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 10-VII-1878, p.160).

<sup>7033</sup> Más luego, Agustín Gómez, Carlos Doncel y Domingo Morón seguirían su ejemplo (Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.I). Ver lista de liberales en Masini Calderón, 1967, Apéndice II. En 1899, Manuel Delfín Romero se quejaba a Roca que el Gobernador Sanjuanino David Chávez "...lo traerá al Gobierno a [Domingo] Morón, y Morón le dará [a Chávez] los años que le falten como Senador" (Manuel Delfín Romero a J. Roca, San Juan, 27-II-1899, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.85).

<sup>7034</sup> Entre los rebeldes que acompañaron a Carlos Juan Rodríguez figuraban Domingo Bombal, Bernardo Corvalán, José Segundo Correa, Hilario, León, y Rufino Correas, Benito Gonsález Marcó, Aureliano, Francisco, José, Narciso, Saturnino y Salvador de la Reta; Eufasio Sotomayor, Genaro Santander, Francisco Zapata, y Carlos Aristipo, Juan de Dios, Juan de la Cruz, Manuel Apolinario, Matías, y Ramón Videla (Masini Calderón, 1967, 262-265).

---

<sup>7035</sup> sobrino carnal de los Gobernadores Franklin y Nicolás Villanueva García (1867-70), sobrino segundo del Gobernador Elías Villanueva Delgado (1878-1881), y sobrino tercero de los gobernadores Aristides Villanueva Chenaut (1870-73) y Joaquín Villanueva Carrillo (1876).

<sup>7036</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606.

<sup>7037</sup> Nacido en 1835, hijo de Nicolás Villanueva y de E. García, y casado con Zoila Escala. Era hermano del Gobernador Franklin Villanueva García, cuñado del Diputado Provincial Tomás Villanueva Godoy, y tío carnal del Senador Benito Villanueva González (Cutolo, VII, 651).

<sup>7038</sup> Hijo de José María Villanueva y de Juana Chenaut, casado con Vicenta Doncel, y padres del Ing. Guillermo Villanueva. Era medio hermano del Gobernador Joaquín Villanueva Carrillo, y tío del Gobernador de San Juan Carlos Doncel Villanueva (Cutolo, VII, 644).

<sup>7039</sup> Jurista experto en minería, autor de El Código de Minería para la Confederación Argentina (Buenos Aires, 1886). Sobrino del que fuera Gobernador de San Luis Justo Daract,

<sup>7040</sup> M. R. Sáez a Julio A. Roca, Mendoza, 12-IX-1875 (AGN, Archivo Julio A. Roca, Leg.2, Documento 458, fs.363-367)

<sup>7041</sup> Ibidem.

<sup>7042</sup> Sommariva, 1929-31, 318.

<sup>7043</sup> Sommariva, 1929-31, 319.

<sup>7044</sup> Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 97.

<sup>7045</sup> hijo de Pedro Aldao Candiotti y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Ricardo Aldao (GP.1854) y Tiburcio Aldao (GD.1866); conuñado del Gobernador José María Cullen (GP.1855/56/67); y padre del Gobernador Ricardo Aldao Nicolorich (GP.1924-28).

<sup>7046</sup> Sommariva, 1929-31, 323.

<sup>7047</sup> cuñado de los Gobernadores Tomás Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1861); José María Cullen (GP.1855/56/67); y Patricio Cullen (GP.1862/63/64); conuñado del Rector de la Universidad de Buenos Aires Juan María Gutiérrez y abuelo del Diputado Nacional Nicasio Salas Oroño (DN/Córd. 1914-18).

<sup>7048</sup> Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 99.

<sup>7049</sup> Sommariva, 1929-31, 331; y Diputados Luis Lagos García y Delfín Gallo, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 28-V-1877, pp.83 y 104.

<sup>7050</sup> hijo del Regidor José Freyre de Andrade y López y de Manuela Rodríguez del Fresno; sobrino político del Gobernador Brigadier Estanislao López; tío del Gobernador Rodolfo Freyre Iturraspe (GP.1902-06); y suegro del Diputado Nacional Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08).

<sup>7051</sup> más luego, Oroño entró a conspirar contra Sarmiento (ver exposición del Diputado Nacional Bosano Ansaldo, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 17-VI-1935, Reunión n.12, p.960-961).

<sup>7052</sup> tuvo la iniciativa de fundar en 1867 el Banco Comercial de Santa Fé (Ensinck, 1971, 48). Era nieto de José Gabriel Lassaga y Echagüe Gaete; marido de Camila González Marate, y de Dominga Cullen Iturraspe; hijo político del Gobernador Patricio Cullen (GP.1862-63); y suegro de Eliseo Videla Olivera.

<sup>7053</sup> Sommariva, 1929-31, 332.

---

<sup>7054</sup> A Domingo Crespo Zabala, marido de Dolores Rodríguez del Fresno, le sucedió en 1854 su sobrino político el Comandante Pedro Aldao Rodríguez del Fresno; y a este último le siguió en 1855 su medio hermano José María Cullen Rodríguez del Fresno. A este último le siguió en 1856 la gobernación provisoria de su tío materno el Coronel Mariano Rodríguez del Fresno; y en 1858 el Coronel Rosendo María Fraga, marido de Inés López Rodríguez del Fresno. A Fraga le siguió en 1861 su conuñado, Mariano Comas, marido de Ana López Rodríguez del Fresno. Luego, en el mismo año de 1861 le siguió su primo Tomás Cullen Rodríguez del Fresno; en 1862 Patricio Cullen Rodríguez del Fresno; en 1864 Nicasio Oroño Baigorri, marido de Joaquina Cullen Rodríguez del Fresno; en 1866 Tiburcio Aldao Rodríguez del Fresno; y en 1868 el hermano de este último Camilo Aldao Rodríguez del Fresno, conuñado a su vez de José María Cullen Rodríguez del Fresno. Para más información, ver Pasquali, 1994a, 232.

<sup>7055</sup> Duarte, 1974, 161-175. Este fué un empréstito contratado para el pago de las deudas contraídas por Urquiza en oportunidad de la Campaña militar que desembocó en Caseros.

<sup>7056</sup> ver Reula, 1963-69, 27-34; Vidaurreta, 1967, 403; Maiztegui, 1994, 69; y el debate suscitado en el semanario *Búsqueda*, a propósito de la Hecatombe de Quinteros, entre los meses de febrero y junio de 1996, con participación de este autor.

<sup>7057</sup> Reula, 1963-69, 27-34; y Vidaurreta, 1967, 403; y 1987, 133.

<sup>7058</sup> en ella se inauguró por vez primera el uso de armas de repetición.

<sup>7059</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 6-VIII-1870, 33a. Reunión, 30a. Sesión ordinaria, pp.379-392. Ver asimismo el discurso del Senador Nacional Aristóbulo del Valle en oportunidad de la frustrada intervención a Salta (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 17-V-1877, p.70).

<sup>7060</sup> Palcos, 1963, 116.

<sup>7061</sup> El Nacionalista (Tucumán), 13-I-1871, año III, n.127. Acerca de la Revolución de las Lanzas, ver Ferrando, 1918; y Maiztegui, 1994, 69. Y acerca de la Segunda Guerra Jordanista, ver Picciulo, 1974.

<sup>7062</sup> Luna, 1976, 76. Este clan hizo triunfar en 1868, contra el partido Mitrista, para Presidente a Domingo Faustino Sarmiento, para Gobernador al Dr. José Benjamín de la Vega, y para Diputado Nacional a su hermano el Dr. Serafin de la Vega; y en 1874 para Presidente al Dr. Nicolás Avellaneda, para Gobernador a Rubén Ocampo y Dávila, y para Diputado Nacional al Dr. José Benjamín de la Vega; y en 1877 para Gobernador al Sr. Vicente Almandos Almonacid.

<sup>7063</sup> Fué Diputado Provincial en 1861, Presidente de la Legislatura en 1862 y 1867, Ministro de Gobierno de Taboada en 1867, y Gobernador Delegado en 1868. Era hijo de Alejandro Montes, porteño; y de María de Jesús Neiro; y marido de Telma Leyba (Cutolo, IV, 626).

<sup>7064</sup> Noble, 1960, 217. Matienzo, en sus Lecciones de Derecho Constitucional, recuerda que en Santiago del Estero, la Legislatura se declaró ella misma en Convención Constituyente. Matienzo le atribuye la invención de ese sistema a los Taboada, pero en verdad pertenece a los Autonomistas del Estado de Buenos Aires, que lo aplicaron en 1854. Cuando ninguno de los hermanos Taboada ejercía las funciones de Gobernador, Matienzo recuerda que actuaban desde la legislatura, y si el Gobernador no procedía de acuerdo a lo previsto, le hacían juicio político o reformaban la Constitución. En una sesión declaraban la necesidad de la reforma, y en la sesión siguiente reformaban la Constitución (Convencional Adolfo Parry, Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 3a., 1 de Febrero de 1949, p.85).

<sup>7065</sup> exposición del Senador Domingo F. Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Reunión Ordinaria, p.203. Las listas, tal como lo describe Ternavasio (1995), "...no estaban constituídas por diferentes nombres, sino por una combinación de candidatos que se cruzaban y repetían" (Ternavasio, 1995, 75).

<sup>7066</sup> Diputado José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

---

<sup>7067</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>7068</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>7069</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>7070</sup> hermano del Diputado Nacional Emidio Posse Talavera (DN. 1882-86); cuñado del Gobernador Arsenio Granillo (GD.1862); y primo hermano del Diputado Nacional Filemón Posse Bores (DN. 1856-62) y del Gobernador José Posse Insúa, (a) "Pepe" (GD.1854; y GP.1864-66).

<sup>7071</sup> cuñado del Diputado Nacional Nabor Córdoba Helguero (DN.1864-72) y tío carnal del Gobernador Lucas A. Córdoba (GP.1895-98).

<sup>7072</sup> Posse, 1993, 76.

<sup>7073</sup> ver Páez de la Torre (h), (1968); y Hardoy, 1993, 43.

<sup>7074</sup> Noble, 1960, 213.

<sup>7075</sup> hijo de Felipe López y de Teresa Gramajo Molina, hermano de los Diputados Provinciales Rudecindo y Tiburcio López Gramajo, sobrino político del Gobernador José Frías Araujo y primo hermano carnal del Gobernador Uladislao Frías Gramajo.

<sup>7076</sup> Bravo, 1995, 6.

<sup>7077</sup> hijo de José Ramírez de Ovejero y de María Antonia de la Zerda; marido de Florencia González Sarverry; tío del Diputado Nacional Angel M. Ovejero Zerda (DN.1890-94; 1902-06); padre del Gobernador David Ovejero González; primo hermano del Gobernador Angel Zerda Medina; cuñado del Gobernador Provisorio Saturnino San Miguel y Moldes (GP.1871); y concuñado del Gobernador Interino Vicente Anzoátegui Pacheco de Melo (GI.1875).

<sup>7078</sup> Como Jefe del Batallón Salta pasó a Catamarca a incorporarse al Ejército Nacional que comandaba Octaviano Navarro. Desde allí, avisado de la invasión de Varela a Salta, se desprendió del grueso de las tropas y se presentó en Salta el 10 de Octubre de 1867 (Centeno, 1929, 143ss., citado por Cutolo, II, 342).

<sup>7079</sup> Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241.

<sup>7080</sup> Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241.

<sup>7081</sup> Centeno, 1929, 143ss, citado en Cutolo, II, 342; y Noble, 1960, 211.

<sup>7082</sup> Páez de la Torre, 1994, citado en Bravo, 1995, 5, nota 9.

<sup>7083</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381.

<sup>7084</sup> cuñado del Gobernador José López del Villar (GP.1851) y concuñado del Gobernador Emilio Quintana Echavarría (GPv.1870).

<sup>7085</sup> hijo de José Antonio Portal y Frías y de Patricia Sánchez de Bustamante; sobrino del Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante; primo hermano de los Gobernadores Roque Alvarado y Serapio Tezanos Pintos y del Senador Teodoro Sánchez de Bustamante (h); y marido de su prima hermana María Jacinta Tezanos Pintos.

---

<sup>7086</sup> hijo de José Eustaquio Iriarte y Josefa Sarverri (Cutolo, II, 665).

<sup>7087</sup> marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (Calvo, VI, 35). Era conuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda.

<sup>7088</sup> hijo del Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante y de Juana Otero Goyechea; hermano de los Gobernadores Plácido y Juan Sánchez de Bustamante; primo hermano de los Gobernadores Pedro del Portal, Roque Alvarado y Serapio Tezanos Pintos; y marido de Concepción Belaúnde Zegarra, hija del Gobernador Cosme Belaúnde Alvarado.

<sup>7089</sup> Noble, 1960, 214.

<sup>7090</sup> Noble, 1960, 214.

<sup>7091</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 44.

<sup>7092</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 44.

<sup>7093</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 45.

<sup>7094</sup> La Legislatura había elegido en 1869 como Senador Nacional a Valentín Videla, resultando Gobernador José María del Carril. Dos años más tarde, en 1871, mientras del Carril renunciaba a la gobernación y era designado Senador Nacional, Videla pasaba a reemplazar a del Carril como Gobernador (Romero Carranza, et. al., III, 46).

<sup>7095</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.IV, pp.660-661.

<sup>7096</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.I, pp.631-633. Guayama era famoso por haber pertenecido a la Montonera de Felipe Varela. Cabe recordar que cuatro años después Mitre no tuvo escrúpulo alguno en aliarse con las tribus Pampas del Cacique Catriel.

<sup>7097</sup> hijo de Martín Gómez y de Josefa Rufino, marido de Dolores Albarracín Castro Cardoso, hija de Lucas Albarracín y de Aniceta de Castro Cardoso, cuñado de Valentín Maradona Echegaray y de José Isidoro Albarracín (Cutolo, III, 357). También era cuñado del Gobernador Saturnino Manuel Laspiur (Cutolo, IV, 108); y primo político del Gobernador Francisco D. Díaz (Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.I, p.523).

<sup>7098</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.IX, 707. Ministro en la gobernación de Domingo F. Sarmiento. Por su matrimonio con Jesús Maradona, hija de Timoteo Maradona, entró a pertenecer al círculo beato. Conjuntamente con Benito Borda, Carlos Mansilla, Ambrosio Lezica y otros resucitó en San Juan en 1869 el Banco de Cuyo, que había cerrado sus puertas en Mendoza (Cunietti-Ferrando, 1989, 8).

<sup>7099</sup> Videla, 1962-90, V, Cap. X, 765-766. Al abandonar el partido del Club del Pueblo el poder en 1873, "...dejó sancionada y en vigencia, esa obra fecunda de su patriótica actividad, de sus propósitos liberales, y del tino y acierto en la dirección de los negocios públicos" (Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883, AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7100</sup> hijo de Tomás Bates y Lorenza Buenanueva, mendocinos, y casado con la sanjuanina Lucinda Correa Garramuño (Videla, V, 1981, 785). Según Mallea, Bates fué Gobernador interino algo más de un mes en seguida del asesinato del Gobernador Valentín Videla, después del cual "...cayó por revolución que encabezó [Agustín] Gómez, para que fuera Gobernador Rosauro Doncel. Es mendocino, sueña con volver algún día al gobierno para vengarse de la caída. Tiene largas cuentas de odios con los Doncel, Gómez, Manuel Moreno y cuantos contribuyeron a su derrumbamiento" (Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.32). Probablemente sea padre, tío o abuelo de Sergio W. Bates, autor del libro Muerte de Jones (la tragedia sanjuanina).

<sup>7101</sup> hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional) Severo Igarzábal; y primo hermano de los Gobernadores de La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio

---

Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja. 1871-74).

<sup>7102</sup> Hijo de Zacarías Gómez y de Socorro Maso, casado en 1870 con su prima segunda Mercedes Dojorti, hermana de Eusebio Dojorti, naturales de Jáchal, y sobrino segundo de Camilo Rojo Angulo (Cutolo, III, 332; y Videla, 1990, VI, 268).

<sup>7103</sup> Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33); y Etchepareborda, 1958, 6. Avellaneda funda el Partido Nacional en Octubre de 1871, en oportunidad de inaugurarse la Exposición de Córdoba (Hardoy, 1993, 45).

<sup>7104</sup> Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7105</sup> Hijo de Pedro Doncel Aramburu y de Carolina Martínez, casado con Rosario Morcillo, hija de Nataniel Morcillo, y tío del que luego fuera Gobernador Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, VI, 232 y 405).

<sup>7106</sup> Según Carlos Doncel, Roca lo tenía por de "...mala parentela y compadrito" (Carlos Doncel a Julio Roca, San Juan, marzo de 1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, Leg.30). Era hijo de Manuel Antonio Moreno y de Manuela Navarro (Videla, 1990, VI, 311).

<sup>7107</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.XI, p.788.

<sup>7108</sup> Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7109</sup> ver Etchepareborda (1958).

<sup>7110</sup> Noble, 1960, 234.

<sup>7111</sup> nacido en 1829, hijo de Salvador Civit y Casas, y de Petronila Godoy Villanueva, casado en primeras nupcias con Clementina Corvalán, y en segundas nupcias con su hermana Teresa Corvalán, hijas del General Victorino Corvalán y de Carmen Zapata (Cutolo, II, 285; y Páramo de Isleño, 1980, 205-225).

<sup>7112</sup> Videla, 1962-1990, Cap. XII, Secc.III; y Martínez, 1979, 116-117.

<sup>7113</sup> Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7114</sup> Videla, 1962-90, V, Cap.XIII, Secc.II; y VI, Cap.III, Secc.III, pp.254-260.

<sup>7115</sup> Mandel, 1978, 130-132; y 1980, 1986, 25; y Prelooker, 1996, 55. Sin embargo, Lewis (1981) pone en duda a Mandel (1980), sosteniendo que no está definitivamente probado que en la primer parte de la segunda onda larga de Kondratiev (1875-1893) se dé una fase de estancamiento y que en la segunda parte (1893-1914) se dé una fase de expansión (Lewis, 1981, 713).

<sup>7116</sup> Shumway, 1993, 276.

<sup>7117</sup> ver la dictadura de Latorre, en Bengoa, 1938, 30.

<sup>7118</sup> sobre la crisis del 74, ver Cortés Conde, 1989, Cap.III, 109-144.

<sup>7119</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 13; y Stewart, 1993, 137. Suter (1995) aclara que las crisis financieras en Argentina fueron breves debido a la presteza con que se superaron las fases de contracción económica (Suter, 1995, 48). La crisis comienza a superarse en 1876 alcanzando su máxima prosperidad en 1883-1884.

<sup>7120</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 13.

<sup>7121</sup> padre del que fuera Presidente de la República, Agustín P. Justo, en la década del 30.

<sup>7122</sup> Palcos, 1963, 112.

---

<sup>7123</sup> alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya. Dicho concepto fué inaugurado en la República Oriental del Uruguay, con el Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado entre los caudillos Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309). A su vez este Pacto estuvo influido por el ejemplo brindado en 1852 por el Acuerdo de San Nicolás, celebrado entre el Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros, y los Gobernadores Rosistas. Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, la fusión era "...esencialmente institucional, es el anodamiento del régimen representativo, es la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan Carlos Gómez, *El Nacional* (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 151).

<sup>7124</sup> Castello, 1991, 442.

<sup>7125</sup> hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía (GPv.1861) y Juan Vicente Pampín y Goytía (GP.1875-76).

<sup>7126</sup> Castello, 1991, 443.

<sup>7127</sup> Noble, 1960, 232.

<sup>7128</sup> ver Costa, 1879; Campbell, 1884; Bengoa, 1938, 30; Tjarks, 1967; Fernández Cabrelli, 1975; y Reyes Abadie, 1977.

<sup>7129</sup> Castello, 1991, 446.

<sup>7130</sup> hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía (GPv.1861) y Gregorio Pampín y Goytía (GP.1872).

<sup>7131</sup> Castello, 1991, 447.

<sup>7132</sup> hermano del Vice-Presidente Marcos Paz, cuñado del Coronel Segundo Roca Tejerina y padre del fundador de la prensa José C. Paz.

<sup>7133</sup> La inquina de Paz contra Echagüe obedecía a que cuando este último fué Juez Federal había condenado a aquél por estafas ("La Pampa" y "La Libertad", *La Democracia* [Concepción del Uruguay], 4-I-1874, año III, n.331).

<sup>7134</sup> *La Democracia* (Concepción del Uruguay), 4-I-1874, año III, n.331.

<sup>7135</sup> Palcos, 1963, 118; Tjarks, 1967, 466; y Reula, 1963-69, 34-39. En la rebelión Jordanista de 1873 participó el General oriental Francisco Caraballo (Tjarks, 1967, 466). Ver asimismo el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 20-V-1873, 4a. Sesión ordinaria, pp.45-48; y 21-V de 1873, 1a. Sesión Extraordinaria, pp.49-91.

<sup>7136</sup> Heras, 1963, 160; y Reula, 1963-69, 39-42.

<sup>7137</sup> Onésimo Leguizamón, *Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados*, 14-V-1873, p.39.

<sup>7138</sup> el del Comandante Manuel Antonio Cardozo que infligió al Gobernador de Córdoba Mariano Fraguero en 1858, el del golpe que el Coronel Diego Wellesley Wilde intentó en Salta en 1864 contra el Gobernador Juan Nepomuceno Uriburu, y el de la asonada militar que ejecutó el Gral. Wenceslao Martínez contra el Gobernador de Corrientes Evaristo López en 1868.

<sup>7139</sup> cabe recordar que el Teniente Julio A. Roca acompañó a su tío materno el Vice-Presidente de la República Dr. Marcos Paz en su gestión conciliadora practicada en Salta.

<sup>7140</sup> primo segundo de los Generales Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h).

---

<sup>7141</sup> J. Roca a Víctor Lucero, Río IV, 28-VIII-1876 (Lucero, 1931, 163).

<sup>7142</sup> Hijo de José de la Cruz Videla y de Margarita Poblet, y casado con Ercilia Bengolea. Era medio primo hermano del Dr. Teófilo Sáa (Cutolo, VII, 607).

<sup>7143</sup> Nacido en Pocho en 1837, hijo de Francisco Cortés y de Tránsito Peralta, y casado con Josefa Carreras (Cutolo, II, 368).

<sup>7144</sup> Nacido en Cerritos Blancos, hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y casado con Clodomira Gutiérrez. Era hermano de Eriberto Mendoza, y cuñado de Adeodato Berrondo (Cutolo, IV, 539).

<sup>7145</sup> Follari, 1995, 16.

<sup>7146</sup> Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>7147</sup> T. Mendoza a J. Roca, San Luis, 21-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6.

<sup>7148</sup> Barraquero, 1926, 473 y 435.

<sup>7149</sup> nacido en 1829, hijo de Salvador Civit y Casas, y de Petronila Godoy Villanueva, casado en primeras nupcias con Clementina Corvalán, y en segundas nupcias con su hermana Teresa Corvalán, hijas del General Victorino Corvalán y de Carmen Zapata (Cutolo, II, 285; y Páramo de Isleño, 1980, 205-225).

<sup>7150</sup> fundado en 1853 y dirigido por Damián Hudson, Alejandro Carrasco y otros (Galván Moreno, 1944, 382).

<sup>7151</sup> marido de Teresa Videla Correas, quien a su vez era sobrina carnal del Diputado Provincial José María Videla (1863), y sobrina política de los Gobernadores Bruno García (1825) y José María Reyna Pizarro (1841).

<sup>7152</sup> Martínez, 1979, 116. Sospecho que el apodo de mazorquero se debía al hecho de ser medio hermano de Benito González Marcó, quien había detentado la gobernación en tiempos de la Confederación.

<sup>7153</sup> fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>7154</sup> fundado en 1870 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>7155</sup> Esta familia de banqueros era de filiación Mitrista (Cunietti-Ferrando, 1989, 23). Ver Bragoni, 1993; Fortín de Iñones, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata la quiebra, crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.

<sup>7156</sup> Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>7157</sup> Hijo del Teniente Coronel José María Villanueva y de Dolores Carrillo, y casado con Margarita Palma. Era medio hermano del Gobernador Aristides Villanueva Chenaut, y tío del Gobernador de San Juan Carlos Doncel Villanueva.

<sup>7158</sup> Eustaquio Villanueva a Julio A. Roca, Mendoza, 14-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). Este partido era acusado de Mazorquero (Martínez, 1979, 116).

<sup>7159</sup> Ver Olguín, 1961, 125.

<sup>7160</sup> Lisandro Moyano a Julio A. Roca, Mendoza, 14-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).

<sup>7161</sup> *Ibidem*.

---

<sup>7162</sup> Lisandro Moyano a Julio A. Roca, Mendoza, 14-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).

<sup>7163</sup> *Ibíd.*

<sup>7164</sup> primo de los hermanos Taboada; marido de Melitona Montenegro; y cuñado de Pío y Alfonso Montenegro. Sus cuñados encabezaron las montoneras Taboadistas en la campaña Santiagueña en 1875, con base en el Departamento de Guasayán, donde tenía sus campos. Se suicidó en Noviembre de 1890 por creerse en la ruina, con motivo de la crisis bursátil de ese año (Cutolo, IV, 623).

<sup>7165</sup> cuñado del Gobernador Provisorio José B. Orgáz (GP.1853) y tío del Diputado Nacional José A. Orgáz Gondra.

<sup>7166</sup> Heras, 1963, 151.

<sup>7167</sup> hijo de Mariano Santillán y de Tomasa Gondra, hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra, y concuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavallía Gondra. Era casado con Delia Palacio (Cutolo, VI, 668).

<sup>7168</sup> "...varios individuos penetraron en su domicilio y pretendieron obligarlo a renunciar. El Senador Gorostiaga denunció el hecho al Senado del que formaban parte en esa época personalidades como del Valle, Sarmiento, Pizaro y otros. El Senado no tuvo vacilación alguna respecto a quien correspondía el castigo de semejante atentado. Oído el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, el Senado declaró que correspondía al Procurador Fiscal del Juzgado Federal de Santiago del Estero, perseguir el castigo del atentado de que había sido víctima el Senador Gorostiaga" (Exposición del Diputado Nacional Pedro Olachea y Alcorta, Diario de Sesiones, 1908, I, Reunión n.18, 26 de Junio de 1908, p.461).

<sup>7169</sup> hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche, y marido de Mercedes Cornejo Castellanos (Cutolo, IV, 153). Era medio hermano del Gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del Diputado Nacional Delfín G. Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín Dávalos Isasmendi (Cornejo, 1972, 83).

<sup>7170</sup> Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Jujuy, 13-V-1873 (AGN, Archivo Roca, Leg.1, fs.654, Doc.248).

<sup>7171</sup> *Ibíd.*

<sup>7172</sup> El oligárquico clan de los Sánchez de Bustamante, núcleo de la facción conocida con el apelativo de Conspícua, que si bien había gobernado Jujuy sin solución de continuidad desde la caída de Rosas, y había votado por Sarmiento, en febrero de 1874 votó por Mitre perdiendo el poder político a manos de la facción Barcenista, simpatizante del Partido Nacional (partidario de la candidatura presidencial de Nicolás Avellaneda). Esta última facción era liderada por el Coronel Napoleón Uriburu Arenales, Comandante del Regimiento XII de Caballería de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. La rebelión Barcenista de Febrero de 1874 obedeció al hecho de que el Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante, había suspendido las elecciones de diputados nacionales que había ganado el candidato Cátulo Aparicio (ligado a los Barcenistas), lo que a su vez originó el levantamiento en armas del Partido Nacional.

<sup>7173</sup> Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.10).

<sup>7174</sup> núcleo de la facción conocida con el apelativo de Conspícua, de inspiración Sarmientista, y cuyo centro era el Club Liberal.

<sup>7175</sup> En el debate sobre la intervención a Jujuy --con motivo de la rebelión Barcenista, partidaria de Avellaneda, contra el dominio de los Conspícuos, afines a Mitre-- celebrado en la Cámara de Diputados, en Abril de 1874, el gobierno de Sarmiento, contradiciendo su política, ensayada cuando la rebelión de Entre Ríos en 1870, sentó la tesis propiciada por Urquiza en Caseros y Mitre en Pavón de que "la rebelión podía crear gobiernos" (Noble, 1960, 249). Para el Congresista Guillermo Rawson, ex-Ministro de Mitre, en el debate sobre la Ley de Amnistía, discutida en Julio de 1875 durante el gobierno de Avellaneda, las intervenciones federales, no eran "...materia constitucional sino política: si los que la piden son nuestros amigos, debe intervenir, pero si son enemigos de la administración nacional, la intervención no debe concederse" (Noble, 1960, 232).

---

<sup>7176</sup> hijo del Gobernador Evaristo Uriburu y Hoyos; hermano del Presidente José Evaristo Uriburu; sobrino carnal de los Gobernadores Vicente Uriburu y Hoyos (GP.1831), Pedro Uriburu y Hoyos (GP.1850), y Juan Nepomuceno Uriburu y Hoyos (GP.1861); y primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (Formosa, 1900), del Diputado Nacional Dr. Pedro José Uriburu Arias (DN/Tucumán, 1874), del Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-1901), y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907).

<sup>7177</sup> Entre cuyos miembros se encontraban Pablo y Joaquín Carrillo, casado el primero con una Padilla Bárcena.

<sup>7178</sup> Hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado con Fernández de los Santos. Era suegro de Nicolás Ojeda y del Coronel Napoleón Uriburu.

<sup>7179</sup> Nacido en Humahuaca, hijo de Plácido Aparicio y de Andrea Belmonte. A los efectos de impugnar su candidatura a Diputado Nacional fué acusado por el Gobernador de Jujuy de haber perdido la ciudadanía debido a que sirvió como Oficial Mayor de la Secretaría del Gobierno revolucionario del Gral. Rendón en Bolivia, que se hiciera fuerte en Sucre, Chichas, Potosí y Cobija (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-VI-1874, 213, 219 y 222).

<sup>7180</sup> Hijo del Diputado Provincial José Benito Sánchez de Bustamante y de Tomasa Tezanos Pintos, sobrino del Congresal de Tucumán Teodoro Sánchez de Bustamante, y marido de Lubina Sarmiento Torres. Fué padre del Vice-Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante y Sarmiento, y primo hermano del Gobernador Daniel Aráoz Tezanos Pintos, y del Diputado Nacional José Sánchez de Bustamante.

<sup>7181</sup> el Diputado Sanjuanino Rafael Igarzábal recordaba que el sólo hecho de que los Sánchez de Bustamante gobernarán Jujuy desde hacía veinte años, justificaba la revuelta Barcenista (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 5-VIII-1874, pp.531 y 538-539; y Sommariva, 1929, I, 455). En ese mismo debate, el Diputado Sánchez de Bustamante juzgó que por ser la mitad de la provincia de Jujuy compuesta por su familia y parientes estaba "...matemáticamente representado aquel pueblo con dos firmas de parientes y dos de extraños" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.217). Por otro lado, Sánchez de Bustamante atribuía con acierto el nepotismo Jujeño a sus fundadores por haber tenido

"...la peregrina idea de ir a poner allí, lejos de las vías de comunicación y de los centros de población, donde no vá la inmigración que descentraliza las familias" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.218).

<sup>7182</sup> Noble, 1960, 249.

<sup>7183</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.220.

<sup>7184</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 5-VIII-1874, pp.531 y 538-539; y Sommariva, 1929, I, 455.

<sup>7185</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.217.

<sup>7186</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.218.

<sup>7187</sup> Los hermanos Santiago y Roque Alvarado Sánchez de Bustamante se hallaban casados respectivamente con Vicenta Portal Sánchez de Bustamante, y con Rita Echavarría Sánchez de Bustamante; los hermanos Manuel y Fermín de la Quintana Sánchez de Bustamante se hallaban casados con las hermanas Serapia y Modesta Echavarría Sánchez de Bustamante; y las hermanas Vicenta, Joaquina, Tomasa y Jacinta Tezanos Pintos Sánchez de Bustamante se hallaban casadas, las tres primeras con los hermanos Juan Manuel, Marcelino Manuel, y José Benito Sánchez de Bustamante y Sánchez Taybo, y la última con su primo hermano el Gobernador Pedro José del Portal y Sánchez de Bustamante (Cuadros J-I y J-II).

<sup>7188</sup> primo hermano del Gobernador Gral. Camilo Rojo Angulo (GP.1864/67); y del Diputado Nacional

---

Tadeo Rojo Angulo (DN.1862-64) (Cutolo, VI, 348).

<sup>7189</sup> G. Rawson, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, p.555.

<sup>7190</sup> hijo de Pedro Antonio Gordillo y Castro y de Patricia Damiana Ortiz de Ocampo.

<sup>7191</sup> hijo de Víctor Gordillo, asesinado por Facundo Quiroga y de Ana María Dávila, y sobrino del Coronel Nicolás Dávila (Cutolo, III, 399-400). El Coronel Olegario Gordillo pertenecía por rama materna a la familia de los Dávila, que representaban la tendencia unitaria o centralista, radicada en Chilecito y ligada a la explotación minera del Cerro de Famatina, enfrentada a la familia de los Ortiz de Ocampo, afincados en los Llanos, partidarios del federalismo artiguista, a quien pertenecía su primo Pedro Antonio Gordillo (Martínez Villada, 1940, 62; y Bazán, 1979, 249).

<sup>7192</sup> ver para este episodio, Luna, 1976, 143-154.

<sup>7193</sup> Luna, 1976, 139.

<sup>7194</sup> Rafael Ruiz de los Llanos, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1-VII-1874, p.257.

<sup>7195</sup> El Partido Autonomista, cuya gestación a nivel nacional se logró en la Liga de Gobernadores orquestada en 1871 en la Exposición de Córdoba (Bravo, 1995, 10), se afirma con la derrota de Mitre en La Verde y Santa Rosa, y sufre su primer desprendimiento: el Partido Republicano, recién con la muerte de Alsina en 1877. Con el debate por la sucesión presidencial, el Partido Republicano se dividió entre quienes apoyaron a Roca, y los que sostuvieron a Carlos Tejedor (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64).

<sup>7196</sup> Bazán, 1992, 487-489.

<sup>7197</sup> José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.578.

<sup>7198</sup> El partido dirigido por Natal Luna se componía de acuerdo al Diputado de la Vega por "...Presidente del Comité: D. Natal Luna; Vice-Presidente 1o.: D. Natal Luna; Vice-Presidente 2o.: D. Natal Luna; Secretario: D. Natal Luna; Tesorero: D. Natal Luna; Club "Natal Luna". Esta es la verdad, porque no había más partidarios del Gral. Mitre en toda la provincia de La Rioja, que D. Natal Luna" (José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, 574).

<sup>7199</sup> hijo del Coronel Lucio Almonacid y Segura y de María Almonacid, y casado con Esmeralda Castro y Castro, hija de Miguel Castro Almonacid y de Azucena Castro Peñaloza (Calvo, V, 40; y Pizarro, 1883, 41).

<sup>7200</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 28-IX-1878, 46a. sesión ordinaria, p.544-545.

<sup>7201</sup> Bazán, 1992, 493-497.

<sup>7202</sup> Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 17-IV-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7203</sup> José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, fs.525 a 527).

<sup>7204</sup> José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, fs.525 a 527).

<sup>7205</sup> José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, fs.525 a 527).

<sup>7206</sup> Videla, 1962-1990, Cap. XII, Secc.III; y Martínez, 1979, 117.

---

<sup>7207</sup> Era necesario, para Gómez, que su hombre de confianza, Palemón González, permaneciera con la Fuerza de Línea para que el partido Doncelista se viera fuerte "...para evitar así que [Rosauro Doncel] se eche en brazos del partido Mitrista, a lo que Doncel siempre no le faltaron inclinaciones" (Agustín Gómez a Julio A. Roca, Buenos Aires, 15-IX-1877, AGN, Archivo Roca, Leg.4)

<sup>7208</sup> Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).

<sup>7209</sup> Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).

<sup>7210</sup> Primero, dió lugar a que "...un batallón de línea permaneciera en la provincia un año entero y a que sus oficiales ocuparan puestos en la legislatura" (Barraquero, 1926, 482). Pero los gobiernos constitucionales primero de Pedro Firmo Unzaga (1876), después del Pbro. José Baltasar Olaechea y Alcorta (1876-78), y más luego de Mariano Santillán (1878-80) y su Ministro Gabriel Larsen del Castaño, reclamaban en vano a los gobiernos de Catamarca y Tucumán, y al gobierno nacional, contra

"...el escándalo de tolerar a los Taboada en sus mismas puertas, pues todos se hacen sordos, porque así conviene a la política de Alsina [del Autonomismo] para continuar la ocupación de Santiago hasta que la situación quede enteramente en sus manos" (José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

La montonera Taboadista no se extinguía (integrada por Telésforo Coria y Segundo Urrejola, y Alfonso Montenegro en Guasayán (Achával, 1988, 360), pues según el Diputado Nacional por Córdoba José Cortés Funes, "...lanzan pequeñas partidas de ladrones desde las fronteras de Catamarca y Tucumán, donde se refugian cuando los persiguen las autoridades de Santiago" (José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

<sup>7211</sup> Entre quienes sostienen la independencia absoluta o ligera correlación entre los conflictos externos e internos se hallaban Otterbin (1968), Rummel (1968) y Tanter (1966) y entre quienes sostenían una correlación positiva entre ambos se hallaban Haas (1965), Sipes (1973), Hazelwood (1973), Wilkenfeld (1968, 1973) y Stohl (1980), todos ellos citados en Ross, 1995, 164.

<sup>7212</sup> régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

<sup>7213</sup> Juan y Luis G. Pinto, hijos de Luis S. Pinto y de Modesta Carreras (Achával, 1988, 369).

<sup>7214</sup> sobrinos carnales de los Lami.

<sup>7215</sup> Los Lami eran hijos de Pedro José Lami y de Inés Bravo de Rueda, primos segundos de los Alcorta y nietos del Alcalde José Bravo de Rueda, aquel que por haber denunciado en 1790 que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades" (Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349).

Por haber Bravo de Rueda repudiado en las elecciones de 1796 al Regidor Propietario Juan José de Erquicia, uno de sus rivales, le convidó con un mate, de resultas del cual falleció repentinamente, aparentemente envenenado.

<sup>7216</sup> "...previniendo a Vd., mi querido Dr. que en todas partes el pan es menos duro y amargo que el que se come en Santiago" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Eran estos emigrados los hermanos Pedro y Jaime Vieyra, y sus tíos carnales los hermanos Pedro José y Francisco Lami, así como Luis G. Pinto,

"...muchos de ellos sin color político, se agregaron al partido embrionario que gobernaba. Quisieron sacar provecho de la victoria que otros consiguieron, pero como había desconfianza, salieron

---

frustradas sus esperanzas" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7217</sup> Luis G. Pinto había "...prestado plata a Gallo" (Larsen del Castaño a J. Roca, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). Para ello, el Comandante Cerri nos revela que

"...compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara que en su mayor parte se compone de los empleados a sueldo del gobierno, e hicieron elegir a un Gobernador [Pedro C. Gallo], que respondiera a sus propósitos cuando menos se lo esperaban los hombres definidos" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7218</sup> Hijo "sacrilego" del R.P. Pedro León Gallo (Información que debo al Dr. Carlos Jáuregui Rueda), marido de Magdalena García Achával, hija de José Antonio García y de Restituta Achával Medina (Calvo, III, 275).

<sup>7219</sup> "...No hay duda que Castellanos tendrá mayor aceptación por Gallo, porque además de ser su pariente, haberlo servido como Ministro, no tiene odios aquí ni relación con la fracción política a que pertenece [Francisco] Olivera y a la que no se le tiene cariño alguno" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-XII-1881, AGN, Sala VII, 5-1-3, fs.462). Era sobrino del Obispo de Cuyo Wenceslao Achával (Frías, 1985, 218).

<sup>7220</sup> Para el Gobernador Pedro Gallo "...proscribir la candidatura de Larsen es evitar con buena política divisiones y trastornos que pudieran serle a Vd. perjudicial (Pedro Gallo a J. Roca, Santiago del Estero, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). Esta candidatura fué frustrada con su arresto, bajo la aparente y falsa acusación de conspirar contra el orden constituido. El 27 de Enero Absalón Rojas le escribe a Roca informándolo que "...Larsen y otros han sido reducidos a prisión. Esta es una de tantas sonceras que se cometen en mi tierra y quizá de las peores que haya habido. No hay motivo que justifique la prisión de Larsen, cuanto porque es enconar mas los ánimos y alarmar la opinión fuera de Santiago, con estas medidas tan extremas. Pero yo no extraño esto, porque hay cerca de Gallo algunos que son salvajes en sus odios. Yo no pretendo tampoco santificar a Larsen, pues lo conozco y sé que tiene un carácter impetuoso, que quiere y odia con vehemencia y le falta la calma y reposo necesarios para soportar las contrariedades de la vida. Creo que Larsen me escuchaba y puedo asegurar que su prisión, que tiene por fundamento un supuesto plan de revolución [Rochista], es injusta, pues que si algún pensamiento loco existió en algún momento de despecho o de exaltación, ese pensamiento no hubiera madurado por cuanto, como le decía a Vd. en mi anterior, no encontrarían apoyo en los elementos del partido, en virtud de haberlos yo vinculado ya al Gobierno, o mejor dicho a Telasco [Castellanos] personalmente" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 27-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). El propio Larsen le escribía a Rocha contándole que "...hasta hoy que van 17 días no se me ha dicho la causa de mi prisión ni se ha dictado auto de prisión, me detiene por simple orden superior y para soltarme andan buscando de que manera pueden hacerlo sin declarar que no hay mérito para proceder contra mí. Estos últimos tiempos me ocupaba en estudios históricos, no salía de casa, ni hablaba con nadie; de esta actitud sacaron que algo tramaba y como son muy miedosos, los candidatos influyeron ayudándoles la mujer del Gobernador [Magdalena García Achával] para que me aprisionaran. Quizá pronto esté en libertad sin instruirse la causa, para la cual no hay mérito, pero aunque esto suceda, no se me escapa que Goyena y Avellaneda han de poner dificultades a mi nombramiento para el Juzgado Federal" (Gabriel Larsen del Castaño a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Sin embargo, Jaime Vieyra sostenía que "...se ha tenido con él toda clase de consideraciones y no se lo ha metido preso sino cuando se han tenido las pruebas evidentes de la revolución, y para que Vd. crea más en ella le diré que Roca desde Córdoba fué el primero que la denunció pues a él fueron a proponérsela pidiéndole su apoyo y cuando él no les aceptó fueron a esa a ponerse de acuerdo con ilusos que nunca faltan" (Jaime Vieyra a D. Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7221</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>7222</sup> hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse.

<sup>7223</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>7224</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

---

<sup>7225</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 11-I-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.11).

<sup>7226</sup> cuñado del Sr. Voget, Gerente del Banco Nacional.

<sup>7227</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7228</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7229</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 13-III-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.186).

<sup>7230</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 17-XII-1879 (AGN, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>7231</sup> En este caso su yerno: el ex-legislador provincial Juan Antonio Pinto Carreras, hermano del que luego fuera el Gobernador Luis Generoso Pinto.

<sup>7232</sup> Según el Diputado Nacional Francisco A. Barroetaveña, en un debate de la Cámara de Diputados celebrado en 1895 "...antes de ahora se atribuía todos los desórdenes, todas las perturbaciones que se producían en Santiago a la influencia de un yerno, que era el instigador supremo" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 7a. Sesión de Prórroga, 25-XI-1895, p.487). "...Todo es un laberinto y hasta hoy no creo que haya nada decisivo. Llegó el Obispo Achával, aseguran trayendo el candidato de Roca, que es el Dr. [Telasco] Castellanos. Mucho hablar, mucho decir, pero nada en los platos y esperan que hable Roca pues están convencidos que no será sino quien el quiera. Allí pues, es donde se resolverá la cuestión Gobernador para el próximo período. Siendo esto así, eres vos quien debes tenerme algo al corriente de las novedades. Aquí sabemos que Rojas inclina a Roca del lado que quiere, que quita y pone empleados a quien le dá la gana, en una palabra es Roca mismo. Esto los tiene indignados por que quunque reconocen los méritos de Rojas, lo rechazan por su origen, aquí amigos no tiene como no sea sus parientes y no todos" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 9-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.40).

<sup>7233</sup> Francisco Olivera a J. Roca, Santiago del Estero, 18-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21).

<sup>7234</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22).

<sup>7235</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22).

<sup>7236</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7237</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7238</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7239</sup> Director del periódico *El País*, fundado en 1890. Hijo del Gobernador Luciano Gorostiaga y de Adela Paz; primo hermano del periodista Mariano Gorostiaga; era por parte de su padre sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y por parte de su madre sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz. Era Gorostiaga además "...el que aconseja a Pintos resistencia a todo trance, ya se vé, como él no tiene nada que perder porque no pasa de ser un aventurero...Es inconcebible la tenacidad y el capricho con que procede el Dr. Juárez, y por mi parte, temiendo herir a Vd. o su política, no quiero abrir campañas contra él ni permito que mis amigos la abran" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 6-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28).

<sup>7240</sup> cuñado de José María Herrera (Jefe de Pol.1884).

<sup>7241</sup> Manuel Gorostiaga a Juárez Celman, 20-II-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10.

<sup>7242</sup> Para Manuel Gorostiaga, las Comisiones formadas para reformar la Constitución estaban "...compuestas

---

de hombres reconocidamente ignorantes y enemigos de Unzaga: son Felipe Berdía, Próspero Silva y Nereo Rojas. Esta Comisión ha sido así compuesta en un plan de conspiración, a la vez que contra la reforma contra Unzaga. En el primer caso...postergarán la vigencia de la Constitución hasta el 85, y si esto no les es posible pretenden declarar cesante a todas las autoridades, para organizarlas en seguida con la Legislatura donde tienen mayoría" (M. Gorostiaga a J. Celman, 25-II-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10). En carta a Roca, Absalón Rojas le refiere con relación a la personalidad de José Nicolás Matienzo, que "...la inexperiencia, la bondad de carácter, la buena fé, corren siempre el peligro de ser sacrificadas aquí donde la intriga, la adulación, la mala fé o perfidia y la deslealtad se han puesto en juego siempre y las más veces con éxito" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7243</sup> M. Gorostiaga a Juárez Celman, 20-II-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10.

<sup>7244</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 13-III-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.186).

<sup>7245</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7246</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7247</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 18-I-1882, AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7248</sup> medio hermano de los Gobernadores Salustiano y David Zavalía Iramain, y cuñado del Diputado y Senador Nacional Dr. Uladislao Frías Gramajo.

<sup>7249</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7250</sup> Cordobés, hijo de Luis S. Pinto y de Modesta Carreras, y marido de Rosa Aliaga (Achával, 1988, 369). Según Larsen del Castillo, Pinto era "...un cretino sin mas mérito que haber prestado plata a Gallo, a Vieyra y Lugones, dos pillos tornasoles, capaces de venderse por un plato de lentejas. Ellos suponen y lo dicen bien alto, que si no entran al Congreso por los Roquistas entrarán por los Mitristas. Tienen razón pues la gente a precio no carecerá de postores" (Gabriel Larsen del Castillo a Julio A. Roca, Cárcel de Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Archivo Roca, Leg.9). Y según Rafael de la Plaza, Pinto "...ocupa una elevada posición, tiene muchos amigos. Su situación comercial es muy buena, es la primera casa de comercio de esta plaza, tiene muy buenos negocios y me parece buen amigo: es íntimo del gobernador, su Ministro general y de Hacienda principalmente" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-V-1882, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-4, fs.465). Y según Julio A. Roca, Pinto "...tiene un espíritu mercantil muy desarrollado y temo vaya a querer hacer una factoría de Santiago que redunde en perjuicio y descrédito del partido (J. A. Roca a Juárez Celman, 11-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11).

<sup>7251</sup> N. Morcillo a J. Roca, Córdoba, 7-VIII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25).

<sup>7252</sup> que a la sazón lo desempeñaba el Dr. Martín Herrera, de filiación Nacionalista.

<sup>7253</sup> Francisco Olivera a J. A. Roca, Santiago del Estero, 1-III-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22.

<sup>7254</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7255</sup> Director del semanario El Pueblo. Hijo de Francisco Olivera y de María del Rosario Rueda y Frías, nieto materno de Pedro Ignacio Rueda y de María Apolinaria Frías y Araujo, y casado con Mercedes Olaechea y Alcorta (Frías, 1956, 260). Era hermano de Diego Olivera, ejecutado por Taboada.

<sup>7256</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.42).

<sup>7257</sup> El Senador Rafael Igarzábal revelaba que esta conducta "...se ha hecho ya una costumbre, porque ya hay

---

más de diez o doce casos en la República, de asustar a los Gobernadores para obligarlos a renunciar". Igarzábal recordaba la estoica actitud de resistencia adoptada en 1858 por el Gobernador de Córdoba Mariano Fraguero (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151).

<sup>7258</sup> el gallinicidio era una típica acción inconstitucional y de visos terroristas, operada por el gobierno central, consistente en arrancar la renuncia de Gobernadores y funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, amenazas y alarmas.

<sup>7259</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7260</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7261</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7262</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7263</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7264</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7265</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7266</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7267</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7268</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7269</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7270</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7271</sup> Hijo de Agapito Zavalía Laguna y de Josefa Gondra Lastra (Calvo, II, 410), sobrino del Gobernador Pedro Gallo Beltrán, y cuñado del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga y del Gobernador Gregorio Santillán Gondra.

<sup>7272</sup> Redactor de El Vulgarizador, fundado en 1876. Hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa Lami, y casado con Delia de la Torre (Lazcano Colodrero, I, 457).

<sup>7273</sup> Hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa Lami, casado en primeras nupcias con Encarnación Benavidez, y en segundas nupcias con Matilde Günther (Lazcano Colodrero, I, 457).

<sup>7274</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

---

<sup>7275</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7276</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.469).

<sup>7277</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7278</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326).

<sup>7279</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 13-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). En palabras de Luis G. Pinto, "...Así como adelantaba en el conocimiento del estado de esta situación, empecé a comprender que ella se había modificado profundamente, hasta el punto de retirarme Gallo del todo, su confianza, reconcentrándose en una fracción política antagónica, los Santillanes, cuyas opiniones favorablemente a la personalidad de Rocha son de pública y reconocida notoriedad. Es lo cierto que Gallo abandonó repentinamente la candidatura de mi hermano Juan declarándolo públicamente, y llamó a los Santillanes con exclusión mía para designar la persona que debía reemplazarlo, la cual venía ya señalada de Buenos Aires (según después se ha sabido) siendo el Comandante Cordero su conductor, y es esta Napoleón Zavalia o Adeodato Gondra, alternativamente. Ante semejante actitud francamente hostil a Vd. [Roca] mi puesto estaba señalado. Llamé algunos de mis más íntimos amigos, les espresé lo que pasaba, y a mi vez tomé mi partido, separándome en mi acción de la política inaugurada por Gallo. Todos los Diputados que habían votado por mi hermano Juan, adhirieron a mi pensamiento, y forman hoy unidos un núcleo bastante poderoso para resolver por sí solos la cuestión electoral en el sentido que procedan. Son estos: Juan Pinto, Pedro Lami, Felipe Berdía, Belisario Saravia, y Teodomiro Paz, propietarios; y Antonio Marcos, Alejandro Gancedo y Santiago Lugones suplentes. Mañana deben reunirse para formular un acta de compromiso, obligándose a dar un voto por la persona que tenga en su seno mayor número de simpatías, y proceder en todo uniformemente según lo resuelva esa misma mayoría" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 2-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25). Y cinco días más tarde, Luis Pinto vuelve a escribir a Roca para ratificar su posición, aclarando que "...Mi actitud actual no obedece a otro fin que al de salvar la situación comprometida por una mala inspiración de Gallo, a quien me he visto en la necesidad de abandonar con mis amigos para hacer ver a todos que habían aquí amigos del Presidente dispuestos a afrontar cualquier situación difícil" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, LEG.25).

<sup>7280</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 13-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

<sup>7281</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). Desde que llegó a Santiago el Comandante Cordero, enviado de Rocha, principió Gallo a instar a Pinto a "...que partiera a Buenos Aires, para que de allí lo defendiera ante el General, queriendo ponerme de pantaya [sic] pero me le he resistido y el hombre [Gallo] tuvo que reventar, dando al suelo la candidatura de Juan [Pinto], principiando por comunicarlo a los Diputados sin decirme palabra a mí, prometiéndoles que muy luego los reuniría para cambiar ideas sobre el nuevo candidato. Esto por supuesto inmediatamente lo supe, y quedé definitivamente persuadido de que sus pretensiones no eran mas que librarse de mí y poder hacer lo que se le antojara quedando solo; pero, sobre la marcha tomé la medida de reunir todos esos diputados amigos míos" (Luis J. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 2-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11). A Rafael de la Plaza le informaban "...que se reúne la Legislatura para conocer de las elecciones de diputados anteriores y pedirán a Don Pedro [Gallo] las actas, si este se niega lo conminan y el Gral. Roca apoya decidida y directamente la destitución y revolución. Si el día fijado hay empate de votos el Presidente de la República decide dando el nombre que a él le agrade" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, ? -VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.42).

<sup>7282</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65).

<sup>7283</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65).

<sup>7284</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5,

---

fs.65). En El Nacional del 31 de Mayo de 1883, se cuenta que el "Sr. Pinto a mas de Gobernador es tendero y almacenero al por menor, barraquero que compra cueros sin certificado, tropero, ropavejero, empresario de mensajerías y últimamente se ha metido a cañero. Las mensajerías que tiene en uso son las que trajo de Estados Unidos D. Timoteo Gordillo, allá por los años 60 o 61. La vida de los pasajeros vá en un hilo, pues no hay viaje que no se vuelquen o se hagan pedazos. Han servido tanto las pobres y para su desgracia han caído a poder de Pinto. Es sabido que los ingenios de azúcar necesitan para sus trabajos una gran cantidad de peones. Este era un problema para Pinto ¿como tener gente que lo sirva, cuando hasta el último guazo ha tenido que sufrir sus raterías de la vara y la balanza o es acreedor de él? Todos lo conocen y le huyen y por mas plata que ofrece nadie quiere servirle. Entró de lleno en el negocio y para procurarse peones, nombró Comandante Militar del Departamento de Silipica, donde está situado su establecimiento, a su hermano Juvenal Pinto y Comisarios y Jueces de Distrito a los mismos de la casa" (El Nacional, 31 de Mayo de 1883, año XXXII, n.11.034).

<sup>7285</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65).

<sup>7286</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65).

<sup>7287</sup> hijo del Inspector y periodista Pablo Lascano y de María de Jesús Gorostiaga, sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga.

<sup>7288</sup> La actitud del Presidente le ha hecho a Gallo "...cobrar miedo y respeto, hacia la autoridad nacional. No hay un solo hombre que no piense que esta estrategema, viene para rehabilitar al que se había perdido [Gallo] por su ambición desmedida ante la opinión de la Provincia y de la República toda, como del Gral. Roca y de Vd. Los amigos que cuenta Vd. aquí, que son por su posición comercial y social importantes, Vieyra, padre del Dr. Alejandro, Silva, Garzón, y otros, me han interrogado en vista de los principales actores...Mi contestación ha sido que Vd. estará conforme y de acuerdo con lo que el Presidente haga, pero que sin perjuicio de esto era de opinión le siguiéramos en el camino de oposición hasta donde creyéramos conveniente. Además, en las reuniones celebradas en Casa de Olivera, he manifestado que siempre que se acatara al Presidente y se contribuyera a destruir a los Santillanes, Rochistas enragé, les acompañará. Después de esto quiero hacerle saber que es materialmente imposible, llevar en torno de D. Luis Pinto a los hombres de alguna importancia, pues la conducta que observara antes de ahora, la desconfianza que se le tiene por los vínculos que le ligan a Gallo, la prevención con que le miran los circuillos de familia, sus ningunos títulos para con la provincia, le hacen un personaje odioso e indigno para los que han nacido y trabajado por la muerte de los caudillos y dar libertad a Santiago" (Antonino Lascano a Juárez Celman, Santiago del Estero, 7-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10)

<sup>7289</sup> Antonino Lascano a J. Roca, Santiago del Estero, 20-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26.

<sup>7290</sup> Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23).

<sup>7291</sup> Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23).

<sup>7292</sup> Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23).

<sup>7293</sup> pues lo que estaba en juego era la elección del próximo Presidente de la República.

<sup>7294</sup> Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del Congreso Nacional (Rato de Sambucetti, 1995, 217).

<sup>7295</sup> El Comandante Cerri, no alcanzaba a explicarse en Enero de 1880, y se le hacía sospechoso "...el proceder del círculo gobernante, de hacer completa prescindencia de los Roquistas ultra. No consultar al partido en general, ni al pueblo sobre la lista de los diputados y no entrar en ninguna clase de arreglos conciliatorios por mantener compacto la unión del partido autonomista. El Gobierno lanzó al público la lista, la impone y no admite ni siquiera uno de los candidatos de la otra parte. Esto es inesplicable para mí" (Daniel

---

Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7296</sup> M. J. Olmos a J. Roca, Santiago del Estero, 9-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25).

<sup>7297</sup> "...el Mayor Cordero ha venido con plata de Rocha para sostener a Gallo y sacar Gobernador que les pertenezca" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-VIII-1882, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-5, fs.6).

<sup>7298</sup> hermano del Ministro de Hacienda de la Nación y luego Presidente de la República Victorino de la Plaza.

<sup>7299</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7300</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Si esas tropas venían "...es posible que Gallo se entregue en el acto. Sé que piensa hacerlo y eso me tranquiliza un poco" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). El martes Plaza se quedó con la valija pronta porque le aseguraban

"...que esa noche debía [el Comandante Daniel] Cerro [o Cerri], [Jaime] Vieyra y otros atacar el Cabildo y a Gallo, y perdí mi pasaje. Hoy sé por Cerro que anoche debieron llevar el ataque y que los que componen el nuevo gobierno tuvieron miedo" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

Pero Cerro se desagradó y suspendió todo y "...ahora dice que espera a [Aureliano] Cuenca" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Parece que a Cerro lo disgustaba mucho la venida de este Jefe, pues

"...dice que después que él se ha fregado viene otro a recoger los laureles. Está de quiebra con Pinto y es uno de los opositores a su candidatura, que asegura ser sostenido por Juárez Celman...Me aseguran que Cuenca viene a ponerse a las órdenes de [Presidente de la Cámara] Lami y que esto asegurará el triunfo de Pinto" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7301</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7302</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).

<sup>7303</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Un mes antes, Rafael de la Plaza le sugería a su hermano que "...si el Presidente se inclina a Rojas en contra de Pinto, es el medio de hacer transacción proponiendo a Jaime, los dos primeros no son queridos, tampoco Pedro Vieyra, mientras que Jaime no tiene oposición es completamente nuevo y no hay apdo. que ponerle" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-VII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.614).

<sup>7304</sup> "...Es acusado Vd. de querer imponer a Pinto y yo a Rojas, apareciendo en esto de punta los dos, de lo que debemos quitar hasta la más mínima sospecha" (J. A. Roca a J. Celman, Santiago del Estero, s/f, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11).

<sup>7305</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 30-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.115).

<sup>7306</sup> Cleto Peña a Juárez Celman, Buenos Aires, 29-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.11).

<sup>7307</sup> Rato de Sambuccetti, 1995, 220.

---

<sup>7308</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373).

<sup>7309</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502).

<sup>7310</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373).

<sup>7311</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 6-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28.

<sup>7312</sup> para José Antonio Vieyra, el único que tenía verdadera influencia familiar y popular era Manuel Gorostiaga: "...su familia a mas de numerosa, está vinculada al antiguo partido Taboadista, unido, compacto y de pié" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>7313</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 6-XI-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28).

<sup>7314</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 10-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29).

<sup>7315</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373).

<sup>7316</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373). Rafael le informaba a su hermano que en Santiago se decía

"...que el Interventor [Cuenca] desea que se nombre Gobernador a una persona imparcial y que no haya tomado participación en las luchas de ésta desde la cuestión Gallo, pero parece que Pinto no acepta arreglo ni temperamento alguno sino bajo la base de Luis Pinto gobernador" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414).

<sup>7317</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414).

<sup>7318</sup> Rato de Sambuccetti, 1995, 220.

<sup>7319</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414).

<sup>7320</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414).

<sup>7321</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>7322</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 16-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>7323</sup> "...Unos me piden que haga renunciar a Pintos, otros que procure sea nombrado Larsen o Vieira (Alejandro) en reemplazo de Pintos. Yo no sé jota de todo este barullo y contesto a las preguntas de Pintos, diciéndole que se aguante hasta ver más claro. Pero le digo con franqueza, me lastimaría mucho que fuera Rojas, que me ha injuriado y con quien no podré jamás hacer buenas relaciones. Me importaría un bledo conservar o no influencias en Santiago, pero no desearía la burla que importaría para mis trabajos anteriores, la decisión de Rojas al amparo de la intervención" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 16-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>7324</sup> "...Gorostiaga se retiró y sigue a la cabeza de los pocos Nacionalistas de aquí maquinando movimientos sediciosos y subversivos, con el ánimo o esperanza de que el Congreso se ocupe de ellos y puedan entonces sacar alguna ventaja. Como estoy prevenido de todo y he tomado mis medidas, creo que nada sucederá. Gorostiaga es un mozo sumamente vano, muy amigo del bombo, y una vez cobijado por el Gobierno, se

---

vistió con el oropel oficial. Ahora que está privado de aquel atavío, por su retiro de entre los amigos, su personalidad está reducida a su valor intrínseco y todo el mundo está convencido de que su tan decantado prestigio se reduce a capitanear cinco amigos" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 22-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>7325</sup> El diario El Pueblo, de Santiago del Estero, confirmaba el cargo hecho por el corresponsal de El Nacional "...de estarse cobrando el siete por mil de contribución directa en lugar del seis que la ley prevee. Se exige la Contribución Directa por propiedades que no están en el catastro, el cual por la ley no se altera sino cada dos años. Se cobra además dos veces la Contribución Directa, al vendedor y al comprador, si ha cambiado de poseedor" (El Nacional, Jueves 14-VI-1883, n.11.046).

<sup>7326</sup> El Nacional, del jueves 31-V-1883, publicaba una nota que decía: "...En años anteriores la Legislatura dictó una ley, autorizando al Poder Ejecutivo para vender cien leguas de tierras fiscales, destinando su producto a la construcción de un Hospital de Caridad. Toda enagenación de bienes del Estado debe hacerse en remate público. Pinto no se para en pelillos y de la noche a la mañana aparece el muchacho Ramón, hermano de Luis y Juan, y que no tiene ni un cuartillo, dueño de las cien leguas compradas privadamente, y pagando por ellas la cuarta parte de lo que valen" (El Nacional, Jueves 31-V-1883, año XXXII, n.11.034). Pero lo más grave parece ser, por la crónica periodística, que los dineros producto de la venta no ingresaron a las arcas fiscales.

<sup>7327</sup> "...Consagrado a administrar, mi política ha sido de reparación, para mitigar el ardor de la lucha pasada, en la que he sacrificado una gran parte de mi bienestar moral y de mi fortuna, sin ulteriores pretenciones, como les consta a mis detractores de ahora, D. Pablo Lascano y Manuel Gorostiaga, a quienes el despecho los hace imputarme malversaciones de la renta pública, cuando saben que ni el sueldo de Gobernador he percibido hasta ahora, por haberlo cedido a la Provincia misma para invertirse en beneficio público" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 5-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31). Gorostiaga se hallaba despechado porque Pinto le había prometido una Senaduría que no se había concretado (Pablo Lascano [h] a Juárez Celman, Santiago del Estero, 3-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.13). Para Roca, "...mi pariente Gorostiaga es capaz de todo. Pero yo estoy decidido a prestarle a Rojas toda clase de apoyo" (J. A. Roca a J. Celman, Buenos Aires, 18-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19).

<sup>7328</sup> El Nacional, Miércoles 13-VI-1883, n.11.045.

<sup>7329</sup> Eusebio Gómez a Juárez Celman, Rosario, 12-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.12.

<sup>7330</sup> Eusebio Gómez a Juárez Celman, Rosario, 12-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.12.

<sup>7331</sup> Según José A. Orgaz "...el partido de Pintos, que es el único que se puede llamar partido va a ir solo a la lucha contra las tres fracciones que se han unido y puedo asegurarle que triunfará si no es ostilizado por Chavarría como temen suceda. No comprendo como es que el Interventor que es amigo nuestro esté tan entregado a Rojas, que como Vd. sabe no es amigo del Dr. Juárez y ostilize a Pintos, que lo es. Debe saber Vd. que a Rojas lo manejan Corvalán y los Santillán, todos estos Rochistas como Vd. sabe y Rojas hace lo que quiere del Interventor" (José A. Orgaz a Juárez Celman, Santiago del Estero, 5-IX-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.13).

<sup>7332</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334). A juicio de Eduardo Wilde, durante su tiempo de lucha por la vida, Chavarría "...se ha hecho un modus vivendi que ha puesto el sello a su carácter, en su imaginación todavía es él un sujeto que no sabe si tendrá que comer el día de mañana. Vive en el pasado en estado de defensa, no tiene la sensación de la propiedad y piensa que los sucesos actuales son humo que se deshace al menor soplo, ha aprendido a hablar sin decir nada o es como los oráculos que decían siempre lo que querían oír los sacerdotes" (Eduardo Wilde a J. Roca, Buenos Aires, 30-V-1887, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>7333</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334).

<sup>7334</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334).

---

<sup>7335</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.415). La particularidad de esta elección fué que hasta el día anterior no se sabía quienes iban a ser los candidatos a Gobernador. Se aseguraba que Rojas no sería candidato, al extremo de haberse producido un enfriamiento entre Rojas y Chavarría (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438).

<sup>7336</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415).

<sup>7337</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415).

<sup>7338</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415). "...Anoche circuló la noticia de que se había dado orden de prisión contra Luis Pinto, que fué llamado por dos veces a la policía y que no quiso ir, quedando en eso la prisión, también se habló de la prisión de dos de sus hermanos, pero ha resultado también falso. Se anuncian otras prisiones pero no sé lo que habrá de positivo. Ayer hubo una especie de manifestación a favor de Rojas, algunos de sus amigos salieron a caballo con él vivándolo por las calles. Hoy hablaba con un amigo y me asegura que hay cartas de Juárez y de Roca en que se asegura que o yo [Rafael de la Plaza] o José Orgaz seremos los designados. Me puse a reír aunque sin desmentir sé también que amigos muy importantes de Rojas han dicho que los trabajos son hoy por mí, pero no lo creo ni veo indicio alguno al respecto" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.415).

<sup>7339</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438).

<sup>7340</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438).

<sup>7341</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438).

<sup>7342</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.446).

<sup>7343</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.446).

<sup>7344</sup> Para Gregorio Gavier "...hemos quedado medios fríos cuando supimos ayer que el tal Firmo Unzaga era negro y Rochista de Ilapa" (Gregorio Gavier a Juárez Celman, Córdoba, 2-X-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.12). Y según Telasco Castellanos, Ministro de Gobierno de Gallo, Unzaga es "...un hombre inteligente, borracho consuetudinario y jugador infatigable, de una indolencia proverbial, despojado enteramente de todo sentido moral. No concibe el cielo sin la ginebra y el naipe. Sus amigos son sus compañeros de trago y de carpeta. El que ejerce sobre él una influencia decisiva es Fidel Castro, antiguo Rector del Colegio de Catamarca, y actualmente residente en Salta. Fué el único hombre que se compadeció de Unzaga, en sus días de mayor desgracia. Había perdido toda su fortuna, y una de sus hermanas solteras saboreó la fruta de Adán. Esto lo abatió mucho, y lo bobificó luego. Durante largo tiempo se lo pasó en Tucumán bajo la sombra de un laurel, incesantemente fumando e incesantemente escupiendo. Castro se compadeció al fin, y lo llevó a Catamarca donde se desbobificó más tarde, y llegó a ser Ministro de Gobierno. Ahora es Gobernador de Santiago. Que le sea leve a ese pobre pueblo!" (Ramón Figueroa a Juárez Celman, Córdoba, 1-X-1883, AGN, Sala VII, Archivo Juárez Celman, Leg.12).

<sup>7345</sup> Noble, 1960, 370; y Rafael, 1982, 51.

<sup>7346</sup> "...Comprendo la situación embarazosa en que lo han colocado los hermanos Vieyra, pidiéndoles interponga su influencia en favor de ambos para que sean elegidos Diputados, pero no debe afligirse mucho porque al menos con Jaime no tiene Vd. deber ninguno, pues este será opositor a su política por cuya razón se nos separó haciendo alianza con Gorostiaga y lo consideramos desde hace algún tiempo fuera de nuestras filas tanto en el orden local como en el orden nacional. Pedro Vieyra no puede ser tampoco porque aunque a

---

mi juicio no existen las razones que con Jaime, tiene los defectos de su maldito carácter que han hecho imposible su candidatura, con respecto a este tendrá que conformarse con una cátedra [en el Colegio Nacional] que le dé para vivir con su familia" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 1-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). En cuanto a la candidatura del Dr. José Nicolás Matienzo como Ministro de Gobierno de Unzaga "...carece aún de la experiencia necesaria, es jóven, y lo que es peor no conoce este teatro que aunque pequeño tiene muy variadas decoraciones y en general muy malos actores. La inexperiencia, la bondad de carácter, la buena fê, corren siempre el peligro de ser sacrificadas aquí, donde la intriga, la adulación, la mala fê o perfidia y la deslealtad se han puesto en juego siempre y las más veces con éxito" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7347</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7348</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7349</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7350</sup> Pedro García a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 7-V-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.390.

<sup>7351</sup> Noble, 1960, 370. En carta a Roca, José N. Matienzo, en ejercicio de la gobernación, le informaba que "...Los ánimos empezaban a agitarse con motivo de continuos disgustos que ocurrían en la Policía entre el Comisario de Ordenes, apoyado por Rojas, y el Intendente, apoyado por Unzaga" (José N. Matienzo a J. A. Roca, Santiago del Estero, 2-IV-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37).

<sup>7352</sup> hermano del Diputado Provincial Próspero de la Silva Calderón (DP.1883); y primo o pariente del Diputado Nacional Cayetano Carbonell.

<sup>7353</sup> En su camino a Santiago del Estero, Luis G. Pinto le manifestaba a Juárez Celman, que Gerónimo Ferreyra, cuñado de Silva, había sido apresado, y que encontraba "...una atmósfera muy pesada contra Silva, pues que ha venido completamente hebrío peleándose con los cantineros y cometiendo todo género de tropelías, y, como Vd. comprende todo esto contribuye a desprestigiar el Gobierno" (Luis G. Pinto a M. Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7354</sup> Con referencia a esta intervención de Sofanor de la Silva, el ex-Gobernador Gabriel Larsen del Castaño le manifiesta a Juárez Celman que "...la mayor prueba de abnegación que a Vd. y al Gral. pudiera darles sería la de hacerme cargo de esa piara. Bien entendido, que me habían de munir de hociqueras, y correas y raciones: que de otro modo ni el mismo Hércules después de sus doce trabajos, emprendería el de gobernar Santiago. Pues en aquella tierra los montes no tienen hojas, los arroyos no tienen arena ni sombra, los ríos no tienen agua ni pezcado, pero en cambio tampoco los hombres tienen fê ni palabra, ni las mujeres pudor! Ni ahora ni nunca se han de decentear esos indios, que han heredado de los quechuas el odio al blanco, y todas las artes y bajezas que ejercieron en largos años de servidumbre" (Larsen del Castaño a Juárez Celman, Buenos Aires, 11-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>7355</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 22-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>7356</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 22-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>7357</sup> "...No es que el pueblo conspire contra ella en un sentido activo: solo le opone la fuerza de inercia, no la apoya, sino simplemente la desprecia. Es por eso que son los mismos elementos oficiales los que se descomponen a cada rato sin la concurrencia popular. Así, esta provincia nos pertenecería sin más condición que la de la neutralidad del Poder nacional. He hecho esta disgresión para indicarte lo que importaría la adhesión de nuestro partido, y las condiciones con que su acción puede ser decisiva" (B. Saravia a Rafael Ruiz de los Llanos, Santiago del Estero, 8-VIII-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392).

---

<sup>7358</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 17-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>7359</sup> nacido en Mendoza, hijo de Eufrasio Pacheco y de Antonia Gutiérrez, Juez de Primera Instancia en 1877, Director y Presidente del Banco Nacional, Diputado Provincial por Buenos Aires, y Ministro de Hacienda de la Nación hasta 1890, fué el autor de la Ley de Bancos Garantidos y creador del Banco Hipotecario Nacional. Se le atribuye la autoría de Bancos de Emisión y Hacienda Pública (Buenos Aires) (Cutolo, V, 254).

<sup>7360</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>7361</sup> pariente por su madre del Gobernador Sofanor de la Silva.

<sup>7362</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>7363</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>7364</sup> Luis G. Pinto a J. Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885 y 30-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7365</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>7366</sup> Rojas había quedado herido con Juárez Celman "...por no haber tenido su apoyo como candidato para Gobernador". Para Pellegrini, "...es deber sobreponerse a estos resentimientos personales en obsequio al Partido". No era político tampoco, para Pellegrini, "...el estrechar el círculo mucho menos cuando se va a gobernar, pues eso hace más difícil el gobierno mismo". Era necesario tener "...cierta elasticidad y espíritu conciliatorio cuando se aspira, como lo hace Rojas con razón, a ser el Jefe de una situación; de otra manera sólo se llega a ser Jefe de un círculo más o menos estrecho" (AGN, Carlos Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 11-IV-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>7367</sup> Rafael, 1982, 65; y Achával, 1988, 373. "Nada queda ya por ver", expresaba El Nacional, en un arrebato de racismo, después de la asunción de Rojas, "...sino la cara de Dios y la popularidad de Juárez. Que venga pronto Sofanor al Senado para no estrañar la falta de Absalón, a quien le recomendamos tenga mucho cuidado al irse de no pasar por debajo de algún monte, no sea que le suceda lo que a su bíblico tocayo que quedó prendido de la mota en un árbol y allí murió renegando de su frondosa cabellera" (El Nacional, martes 8-VI-1886). Con referencia a la prolongación del mandato de Sofanor de la Silva, el ex-Gobernador Gabriel Larsen del Castaño le manifiesta a Juárez Celman que "...la mayor prueba de abnegación que a Vd. y al Gral. pudiera darles sería la de hacerme cargo de esa piara. Bien entendido, que me habían de munir de hociqueras, y correas y raciones: que de otro modo ni el mismo Hércules después de sus doce trabajos, emprendería el de gobernar Santiago. Pues en aquella tierra los montes no tienen hojas, los arroyos no tienen arena ni sombra, los ríos no tienen agua ni pezcado, pero en cambio tampoco los hombres tienen fé ni palabra, ni las mujeres pudor! Ni ahora ni nunca se han de decentear esos indios, que han heredado de los quechuas el odio al blanco, y todas las artes y bajezas que ejercieron en largos años de servidumbre" (Larsen del Castaño a Juárez Celman, Buenos Aires, 11-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>7368</sup> Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215.

<sup>7369</sup> "...Dos Vocales de la Corte y uno (o los dos) Juzgados de Primera Instancia ofrecidos por los Caballeros de la situación a los Rochistas (según Zavalía) es algo que no estaba previsto y que dá la medida de los aprietos en que se hallan sin tener como formar Administración de Justicia, sintiendo por otra parte además el peso de la opinión del país sobre los que manejan el Gobierno de Santiago" (Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7370</sup> Incluso en numerosos casos, las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado Nacional, pertenecientes a las provincias periféricas, no estaban disponibles para los miembros de sus propias oligarquías, por cuanto los gobiernos provinciales en acuerdo con el Gobierno Nacional los reservaba a los miembros de la oligarquía central (Barman y Barman, 1976, 425). A estos últimos, se los denominaba en el Río de la Plata

---

"alquilones" (Heras, 1959, p.XLVII).

<sup>7371</sup> Gibson, 1996, 40 y 52-53.

<sup>7372</sup> Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162.

<sup>7373</sup> parafraseado de Morrow, 1991, 907.

<sup>7374</sup> Morrow, 1991, 907.

<sup>7375</sup> Dicho concepto fué inaugurado en la República Oriental del Uruguay, con el Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado entre Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309). A su vez este Pacto estuvo influido por el ejemplo brindado en 1852 por el Acuerdo de San Nicolás, celebrado entre el Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros, y los Gobernadores Rosistas. Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, la fusión era "...esencialmente institucional, es el anodamiento del régimen representativo, es la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan Carlos Gómez, *El Nacional* (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 151).

<sup>7376</sup> Campobassi, 1980, 365.

<sup>7377</sup> Campobassi, 1980, 381. Según Horacio B. Oyhanarte, Roca le había prometido también la candidatura a su primo hermano carnal José C. Paz, Dueño y director de La Prensa, pero cuando llegó el momento decisivo se la ofreció a su conuñado, y para Paz la Intendencia de Buenos Aires, que este rechazó (Oyhanarte, 1932, 1988, 54).

<sup>7378</sup> El plan general de revuelta armada del Rochismo no sólo se circunscribía a las fronteras argentinas, sino que alcanzaba a la República Oriental del Uruguay, más precisamente a lo que se consideraba la dictadura del Gral. Máximo Santos, sucesor de la dictadura del Coronel Lorenzo Latorre. Para la intromisión Argentina en la política Uruguaya de la década del 80, en la que se dió en denominar la Revolución del Quebracho (1886), ver Viana, 1944, 1979; Caillet-Bois y Annecou, 1968; Williman, 1979; Vidaurreta, 1983; Arocena Olivera, 1988; Moraes, 1995; y Rato de Sambucetti, 1995; y el debate suscitado en el semanario *Búsqueda*, a propósito de la Hecatombe de Quinteros, entre los meses de febrero y junio de 1996, con participación de este autor. En carta de Octavio Gondra a Victorino de la Plaza, aquél le manifestaba que "...el plan es producir una conflagración general principiando por el Estado Oriental, que servirá después de cuartel general a las operaciones contra nosotros. Los emigrados Orientales, que a no dudarlo, reciben recursos del Banco de la Provincia [de Buenos Aires], han convertido la margen derecha del Uruguay en foco permanente de conspiración" (Octavio Gondra a Victorino de la Plaza, Concordia, 29-X-1884, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, Leg.393). Y en carta a Victorino de la Plaza, Andrés Lamas, de conocidas simpatías por el Imperio, cuenta que: "...en un banquete a bordo de la primera nave de guerra argentina ["Almirante Brown"], y con la circunstancia muy agravante de ser en presencia del Sr. Presidente de la República, el Gobernador de Buenos Aires [D. Rocha] creía posible y presentaba como un objetivo político la reconstrucción del antiguo Virreinato; y no hace

---

muchos días que se ponía en circulación un libro, muy atrayente por su mérito literario, en que un diplomático Argentino, en actual servicio en Europa [¿Isidoro Ruiz Moreno?], presenta la anexión como un ideal, realizable a pedido de los mismos Orientales; y tal realización no puede suponerse posible si no contando con que la guerra civil imposibilita la nacionalidad de que se trata. Ahora los periódicos de Buenos Aires se han encargado de establecer que desde esta Ciudad se le lleva, de nuevo, la guerra civil al país vecino. Por ellos consta que aquí se han reunido y se han organizado y que de aquí han partido las fuerzas revolucionarias que van a promoverla; y que aquí se preparan y de aquí van a partir los hombres y los elementos bélicos que deben aumentar el combustible de la hoguera devoradora que, desde aquí, se enciende en la otra orilla del río" (Andrés Lamas a Victorino de la Plaza, s/f, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Leg.390). Para la influencia argentina en la Revolución del 97 y el 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; Ponce de León, 1956, 1978; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; y Chasteen (1995). El sueño de una reconstitución del antiguo Virreinato del Río de la Plata también alcanzó a cierto sector de la elite Boliviana, más precisamente a Mariano Baptista, embajador en Buenos Aires del Presidente Narciso Campero, luego de la derrota en la Guerra del Pacífico (Rey Nores y Rey Nores, 1994, p.119 y nota 58).

<sup>7379</sup> donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la pertenencia a un clan familiar enfrentado a otra facción movilizada por la característica compartida de la pertenencia a otro clan familiar.

<sup>7380</sup> por vínculo cruzado se entiende el régimen en el cual los individuos pertenecientes a un núcleo central participan de diferentes afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

<sup>7381</sup> Hijo del francés Juan Nougues, y la tucumana Josefa Romero Urrea, casado con C. Oromí y Saavedra, hermano de los legisladores Juan Luis y Ambrosio Nougues Romero, tío del Gobernador Juan Luis Nougues Terán y del Diputado Nacional Ambrosio Ascasio Nougues

<sup>7382</sup> Miguel M. Nougues a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.8).

<sup>7383</sup> Miguel M. Nougues a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.8).

<sup>7384</sup> para los casos de Santiago del Estero y San Juan, permítaseme citar a Saguier, 1997a y 1997b.

<sup>7385</sup> Miguel M. Nougues a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.8).

<sup>7386</sup> hermano de Juan y Wenceslao Posse Talavera, primo hermano de Pepe Posse y cuñado del Dr. Arsenio Granillo. Socio de su padre en la explotación del Ingenio La Reducción.

<sup>7387</sup> Pepe Posse Insúa y su hermano Martín, eran por parte de madre de origen porteño --a diferencia de sus primos Juan, Emidio y Wenceslao Posse Talavera y Filemón Posse

---

Bores, que eran de pura cepa tucumana. Los padres de Pepe eran entre sí primos lejanos. La madre de Pepe, Doña Josefa Insúa Collins, era hija de un gallego (Tomás de Insúa Posse) pero nieta por parte materna de un inglés y una sevillana, Juan Tomás Collins y María Andrea Mansilla; hermana del Oficial de Aduana Manuel Norberto Insúa; y prima hermana de Rafael Blanco Collins, marido de Josefa Arguibel y López de Cossio (Fernández de Burzaco, 1986, I, 295; II, 143; y IV, 61). Su tío Manuel Norberto Insúa tuvo una pulpería hasta 1806, se incorporó luego a la burocracia virreinal, y murió en 1837, de acuerdo a Rivera Indarte, de "enfermedad sospechosa", pues era el funcionario que asistía diariamente para atender la apertura del calabozo en que se encontraban alojados los hermanos Reynafé (Piccirilli, Romay, y Gianello, IV, 505, citado por Cutolo, III, 658).

<sup>7388</sup> Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.8).

<sup>7389</sup> conuñado del Diputado Nacional Julián Murga.

<sup>7390</sup> hijos de Martín Posse Insúa y de María Méndez Moure.

<sup>7391</sup> Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.8).

<sup>7392</sup> Director de El Interior, entre 1880 y 1881. Era hijo de Benjamín Posse Pereyra y de Vicenta Alvarez; sobrino político del Gobernador Wenceslao Posse Talavera; sobrino segundo carnal de Pepe, Wenceslao y Filemon Posse; y marido de Josefa del Campo Bustamante (Posse, 1993).

<sup>7393</sup> Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 6-IX-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18).

<sup>7394</sup> hermano menor del Presidente Nicolás Avellaneda.

<sup>7395</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>7396</sup> hijo del Gobernador Agustín Justo de la Vega y de Tomasa Silva Zavaleta; y sobrino político del Gobernador Juan Manuel Terán Alurralde y del Diputado Nacional Sixto Terán Alurralde.

<sup>7397</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15.

<sup>7398</sup> Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>7399</sup> Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>7400</sup> Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

---

<sup>7401</sup> En una desgarradora carta a Roca, Posse reconocía tener "...un infierno dentro del corazón, espectáculo poco agradable para mostrar a los amigos, pero siento la necesidad de decírtelo como explicación de mi mala situación. Están del todo y para siempre rotos mis vínculos de familia, no me queda sino un hilo que me liga a la vida y es mi hija Manuela [mujer de Benjamín Ledesma]. Mis dos hijos varones [Carlos y Faustino] me han faltado al respeto bestial y atrozmente, sin reconciliación posible, y se han alzado con gran parte de mis intereses por la jenerosa imprudencia de haberles confiado sin cautela a su administración. Hoy sostengo dos pleitos odiosos contra ellos, y no tardará en aparecer un tercero con la madre que está de parte de los hijos contra el padre. Este estado de guerra doméstica lo inhabilita a uno para el trabajo porque falta el estímulo cordial de saber a quien destina sus frutos. Se caen los brazos y el brío cuando uno tiene al frente enemigos en vez de hijos amigos de sus padres" (José Posse a J. Roca, Tucumán, 6-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>7402</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 3-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.

<sup>7403</sup> Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18. Al Gobernador había llegado el rumor de que Posse tenía el pensamiento "...de ponerles [a los Dres. Emidio y Juan Terán] las clases a horarios incómodos de modo que otras atenciones de más importancia que tienen les impidan concurrir a las clases" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 15-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). El hecho era que como en los Tribunales los horarios cambiaban según las estaciones, el Juez y Profesor Dr. Emidio Terán pretendía "...que lo haga para su exclusivo provecho ¿porqué no pide allá y no acá que le acomoden las horas?" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 5-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Tal era la ofensiva emprendida por Nogués contra Posse, que su sobrino Benjamín Posse le escribe a Roca para decirle "...que al pobre Tío Pepe lo están embromando de una manera muy fea. Todos esos nombramientos que están haciendo para ese Colegio Nacional son actos de franca hostilidad a su persona" (Benjamín Posse a J. A. Roca, Córdoba, 8-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 15). Y en Abril de 1881 Nogués le pedía a Roca que no aceptara la renuncia de Terán "...para de este modo hacer comprender a Don José que no es dueño absoluto del Colegio Nacional i que si pretende servirse de él para satisfacer sus rencores el Gobierno Nacional no está dispuesto a consentir en que sacrifiquen a nuestros amigos" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 7-IV-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Seis meses después, Nogués le informa que sus amigos "...con un pretexto o con otro han sido separados del Colegio y los que todavía se conservan allí como Aráoz, [Agustín] Vega [primo de Nicolás Avellaneda] y otros, son constantemente hostilizados y estos que necesitan el sueldo que ganan ven que la cooperación que prestan a mi gobierno tiene que serles tal vez muy cara" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18).

<sup>7404</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 9-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Benjamín Posse en carta a Roca le cuenta, que en oportunidad de las disputas entre José Posse Insúa, (a) "Pepe", y su primo Emidio Posse Talavera, ha "...visto de cerca las cosas de esta Provincia, he mirado de cerca y de lejos sus hombres dirigentes, he penetrado en el fondo de sus disidencias; y creo decir verdad cuando digo que estas rencillas intestinas que a la distancia parecen camorras entre frailes, tienen raíces profundas y pueden producir resultados desagradables y realmente lamentables, si la intervención directa de Vd. no se deja sentir de una manera decisiva en el sentido de la

---

pacificación sincera y duradera, pues este cese de las hostilidades no es mas que una tregua en que quedan intactos los resentimientos y vigorosos los rencores que últimamente estallaron" (Benjamín Posse a J. A. Roca, Tucumán, 2-III-1881, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.15).

<sup>7405</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). En carta a Roca, Benjamín Posse le relata el incidente que mantuvo con Miguel Nougués: "El 31 de Enero a las 7 de la tarde, me hallaba sentado en un asiento de la Plaza, en frente a la botica de Reto, acompañado de Enrique Posse, cuando pasó el Dr. Nougués, acompañado del Dr. Matienzo (un coyita bribón). Digo mal cuando digo que pasó; no pasó; se detuvo sobre mí (Habían mediado ofensas de periódico: él me mandó ofender, yo lo ofendí directamente). Sin hablar palabra, sin permitirme siquiera que me pusiese de pié, por sorpresa, a traición (es la palabra, aún cuando Nougués sea mi amigo) me dió un garrotazo en el oído derecho, me agarró de ambas muñecas, y se me vino encima, con todo su peso de mastodonte o megaterium. Pesa mucho el doctor!. Como Dios me ayudó -de abajo- medio arañado y medio arañando, conseguí sacar mi revólver. Pero no podía hacer uso de él, pues me hallaba perfectamente agarrado. Luché otro poco, hice esfuerzos supremos por levantar la boca del cañón hasta hallar persona, ya que no podía levantar la mano y, cuando al fin creí haberlo conseguido, hice fuego...(es mi revolver un bull-dog que ladra como un remington y pone en movimiento a todo Tucumán)...Que sustazo aquel!. Mi amigo Nougués pesó mucho menos. Consegui alzarlo (no se de donde saqué tanta fuerza), ponerlo sobre mi pecho, meter como al respaldo de asiento, e irme con él al otro lado, a la plaza, del paseo ¿me entiende?. Fué una evolución curiosísima. Al caer ambos (no al suelo, pues caímos de pié, lo que quiero decir es, al llegar al otro lado, por sobre el respaldo del asiento, con las cuatro manos sobre mi revólver, tuve otra vez libertad en un dedo, y apreté. Jamás, me dije, a que este pícaro me tiene agarrado el cilindro, y ha caído la aguja del martillo sobre la cápsula servida?....Pero después, en el informe médico ví que Nougués tenía oradado un dedo con algo punzote que había caído sobre la uña. Me espliqué entonces la desgracia del buen tiro, ya que el malo solo había conseguido chamuscarle los huevos (si no es castrado). En aquel estado de la lucha (yo tenía en el cuerpo el primer garrotazo de salutación, otro en la sien derecha, y otro en el hombro derecho, chicos los últimos, grandecito el primero) en aquel estado, digo, fuimos separados por los vigilantes y por los curiosos, y llevados a la Policía. Como aquí entienden los fueros del Diputado de una manera pecuaria, fueron puestos en libertad Nougués y su garrote, y yo y mi revólver fuimos puestos presos e incomunicados. No es Nougués, mi querido Julio, son los Padilla: no se deje engañar. El atentado de Nougués (aleonado por sus amigos que se hallan empeñados en hacerlo creer que es un carácter) no tenía mas fin que el de inutilizarme. La conspiración es contra el Ministro Bores y contra mí, nada mas. por el momento somos el único inconveniente para la realización de los planes de ellos" (Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 4-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>7406</sup> "...la ley es esa: irán al Congreso algunos Vegas que apuntarán hacia donde [Marco] Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más favorable y más honroso para ellos, no servirán para nada cuando se presente una situación un tanto embarazosa, en que sea necesario poner a prueba la inteligencia o el temple de alma de cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que considero inevitable) y no tengan razón de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un desencanto prematuro. Pero ojalá me hiciera al mismo tiempo el favor de convenir conmigo en que la mala impresión producida por

---

tres Vegas, o tres Teranes, o tres cualquiercosa, sacados diputados de una hornada, no sería capaz de conmover en lo mínimo los fundamentos de su Gobierno; ni el hecho sería mirado por Vd. mismo sino como un detalle insignificante, hijo de la casualidad mas que de la intención, e indigno de llamar la atención de un hombre serio. Pero dos Posse...ah! eso no! es menester suprimir uno!...Pero, ¿cuál? el más seguro, pues! el que sea más sincero, aquel de quien no haya temor de que gane los yuyos al sentirse desairado! naturalmente si lo hemos probado como andamio y lo hemos hallado firme, ¿como debemos suponer que no sirva para palo de atar terneros?...que se espere es muy jóven todavía!.... Yo como Rousseau caricaturado por Voltaire en Don Cándido el optimista, no tengo más que repetir: tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles! Pero no puedo menos que murmurar como la mujer corrida: obras son amores" (Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>7407</sup> Bravo, 1995, 16, nota 43. Emidio Posse difería de la creencia de Astigueta y otros acerca de la personalidad de Nougués, pues "...no lo creo a Nougués pillito y menos traidor, veo en él un hombre a quien manejan Avellaneda Eudoro y Sisto [Terán]" (Emidio Posse a Roca, Tucumán, 8-XI-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.19).

<sup>7408</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 11-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21).

<sup>7409</sup> C. Mur a J. Roca, Santiago del Estero, 12-I-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>7410</sup> hijo de Manuel Paz, partidario de la Confederación, y de Dorotea Terán Silva, casado con Dalmira Colombres Gutiérrez, nieta del "Peludo" Gutiérrez, hermano del Diputado Nacional Manuel Paz Terán, cuñado del Diputado Nacional Ernesto Colombres Gutiérrez, y tío del Gobernador Ramón Paz Posse, y de los Diputados Nacionales Eduardo Paz Colombres y Vicente Gallo Colombres.

<sup>7411</sup> "...Clementino Colombres, primo del Gobernador;  
Bernardo Colombres, primo y cuñado del Gobernador  
Ignacio Colombres, primo del Gobernador  
Vicente Gallo, primo y cuñado del Gobernador  
Santiago Gallo, primo y cuñado del Gobernador;  
Pedro Huidobro, primo y cuñado del Gobernador;;  
Augusto Alurralde, primo y cuñado del Gobernador;  
Sisto Terán, primo y cuñado del Gobernador  
Miguel López, id., id.  
Ambrosio Romero, id., id.  
Alejandro Mariño, id. del Ministro  
Agustín Vega, id., id.  
Pedro Bascari, id., id.

A mas queda Juan Posse, concuñado y socio del hermano del Gobernador, Ambrosio y Miguel Nougués, satisfechos y obligados con la senaturía a este y un Bouquet Roldán proveedor por más señas"

(La Patria Argentina, Viernes, 20-IV-1883, n.1571, "Un gobierno de familia").

---

<sup>7412</sup> Bravo, 1995, 13.

<sup>7413</sup> sobre esta ley, ver Cullen-Crisol, 1991.

<sup>7414</sup> Juan Fuentes a Carlos Fauvety, Monteros, 24-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

<sup>7415</sup> L. Quinteros a Luis del Carril, Tucumán, 12-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7416</sup> médico, famoso por su lucha en oportunidad de la epidemia de cólera.

<sup>7417</sup> Eliseo Cantón a J. Roca, Tucumán, 23-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>7418</sup> probablemente hijo de Lucas Zavaleta y de Ignacia Silva Zamudio.

<sup>7419</sup> Gregorio Zavaleta a D. Rocha, Tucumán, 17-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7420</sup> fundador del periódico La Opinión Pública, conjuntamente con Federico Alvarez, quienes le hicieron la guerra entre 1882 y 1883 al gobierno Juarista de Luis Generoso Pinto.

<sup>7421</sup> Bajo la dirección de Zenón J. Santillán (1883) se enfrentó al gobierno de Benjamín Paz. Estando dirigido por Salvador Alfonso (1884) absorbió a *El Republicano*. Estaba crudamente enfrentado a *El Orden*, fundado por Ernesto Colombres y redactado por Pepe Posse (García Soriano, 1972, 21-25).

<sup>7422</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 16-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

<sup>7423</sup> Existieron contemporáneamente dos Luis del Carril, el uno Sanjuanino y el otro porteño. El Sanjuanino era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecinado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). El porteño era nacido en Mercedes, Uruguay, en 1835, hijo del Vicepresidente de la Confederación Argentina Salvador María del Carril y de Tiburcia Domínguez López, y hermano del Diputado Nacional y Vice-Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y matrimoniado con Dolores Lagos Moyano, nacida en Mendoza (Calvo, V, 166). Me inclino a pensar que el Luis del Carril de marras es el primero. Este del Carril se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65).

<sup>7424</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

<sup>7425</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

---

<sup>7426</sup> Barraquero, 1926, 473 y 435.

<sup>7427</sup> José Fernández López a Juárez Celman, Buenos Aires, 9-VII-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22. José del Viso en carta a J. Celman dice que "...los originales de esos telegramas serán los que se lean [en la Cámara]. Será fácil que se produzca con este motivo una moción de juicio criminal, al autor de esa violación de correspondencia, si es verdad que la hay, cuyo juicio deberá comenzar por el Diputado que presente esos despachos" (José del Viso a Juárez Celman, Buenos Aires, 17-VI-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

<sup>7428</sup> Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Ostende, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58).

<sup>7429</sup> político Tucumano, seguramente pariente del Gobernador Próspero García.

<sup>7430</sup> hijo de Vicente Gallo Ispizúa y de Delfina Terán, marido de Aniceta Lagos, santafesina; cuñado del Diputado Nacional Dr. Luis Lagos García; y conuñado de Carlos Pellegrini. Era tío carnal del Diputado Nacional Vicente Gallo Colombres.

<sup>7431</sup> José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>7432</sup> José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>7433</sup> Juarista al igual que su hermano Isaías Padilla Puente y su medio hermano Vicente Padilla Domínguez; y hermano entero de los Rochistas Angel Cruz y Tiburcio Padilla Puente.

<sup>7434</sup> hijo de Francisco Bores y de María Ruiz Huidobro; y primo hermano político del Gobernador Juan Posse Talavera.

<sup>7435</sup> José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003458.

<sup>7436</sup> José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003458.

<sup>7437</sup> hijo del Dr. Salustiano Zavalía Lami y de Genuaria Iramain Gallo; hermano del Gobernador de Tucumán David Zavalía Iramain (GD.1867); medio hermano del Gobernador de Santiago del Estero Luis Frías Iramain (GP.1871); y sobrino del Gobernador de Tucumán Agustín Alurralde Ojeda.

<sup>7438</sup> Salustiano Zavalía a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

<sup>7439</sup> el autor "...de la lista de los diez y ocho parientes" (El Nacional, Miércoles, 7-III-1883, año XXI, n.10.964).

<sup>7440</sup> José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J.

---

Celman, Leg.17).

<sup>7441</sup> nacido en Salta, hijo de Gabriel Augusto Lacroix Chanet, n. en Lyon en 1802, y de Francisca Paz de las Quintas, asesinado en 1909 en Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fé; y hermano menor de Salustio Lacroix, integrante de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

<sup>7442</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7443</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7444</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7445</sup> A juicio de José Padilla "...Es más que probable que este desacierto de D. Emidio emana del mal estado de su cabeza, pues los últimos ataques apopléticos que ha sufrido parecen haberle traído un reblandecimiento cerebral bastante sensible. Todas las personas de su familia que están interesadas en el buen éxito de la campaña, lo creen extraviado y debilitado en su razón" (José Padilla a Juárez Celman, Tucumán, 18-VIII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>7446</sup> estaba constituida por los clanes familiares de los Bárcena, los Carrillo, los Padilla, los Alvarez Prado, los Blas y los Ojeda, y el cuñado Comandante Napoleón Uriburu, adictos a Avellaneda y al partido Nacional.

<sup>7447</sup> entre sus miembros estaba la familia de los Sánchez de Bustamante, que fué partidaria primero de la Confederación Argentina; producida Pavón, fué primero adicta a Mitre y luego a Sarmiento; y cuando Sarmiento se pronunció en 1874 a favor de Avellaneda volvió a ser adicta a Mitre.

<sup>7448</sup> hermano del Derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de Salta (Bidondo, 1980, 399).

<sup>7449</sup> T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 27-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-3, fs.106).

<sup>7450</sup> ex-Gobernador Interino, nombrado por los Conspicuos. Sobrino o hermano de Francisca Cau, mujer del Conductor del Situado Real Potosino de 1807 Don Gabriel Cuñado. Dicha Doña Francisca, una vez viuda contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde.

<sup>7451</sup> T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 27-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-3, fs.106).

<sup>7452</sup> hijo de Sinforoso Alsina y de Carmen Alemán Puch, y marido de Mercedes Zapata Arias (Cutolo, I, 102). Era sobrino político del Coronel Francisco Centeno.

<sup>7453</sup> Francisco Alsina a Victorino de la Plaza, Salta, 7-VI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.528).

---

<sup>7454</sup> Hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata García, aquella heroína que rescatara de la pica la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán.

<sup>7455</sup> Norberto Quirno Costa a Próspero García, Buenos Aires, 8-VII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>7456</sup> Ovidio Lagos a Juárez Celman, Rosario, 17-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7457</sup> primo hermano del Gobernador Sergio Anselmo Alvarado Portal (GP.1891-93; 1898-1901); y consuegro del Gobernador Miguel Puch Velásquez (GPv.1836).

<sup>7458</sup> Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 27-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7459</sup> nacido en Salta en 1837, Ministro de Juan Pablo Saravia en 1873 y de Benjamín Zorrilla en 1875, Senador Nacional entre 1875 y 1880, Administrador de la Aduana de Jujuy, Profesor del Colegio Nacional de Jujuy en 1886, redactor de *El Autonomista*, órgano del partido Radical. Era hijo de Mariano Linares Toledo y de Faustina de Sanzetenea y Morel; marido de Lucía Uriburu Arias; y hermano del Obispo Matías Linares Sanzetenea (Cutolo, IV, 198).

<sup>7460</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7461</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7462</sup> hijo del Gobernador Juan Nepomuceno Uriburu y de Casiana Castro; marido de Concepción Matorras Navarro; cuñado del Senador Nacional Federico Ibarguren Díaz Niño (SN.1871-80; DN. 1902-06); suegro del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04); y primo hermano de Domingo Güemes Castro, aunque distanciado políticamente.

<sup>7463</sup> Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7464</sup> El Nacional, sábado, 12-VI-1886.

<sup>7465</sup> Pompeyo Pizarro a Victorino de la Plaza, Rosario, 1-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

<sup>7466</sup> hermano del Senador Provincial de Córdoba Luis Argüello Tissera (SP.1884-92); y probablemente primo hermano del R.P. Juan Capistrano Tissera.

<sup>7467</sup> D. Argüello a J. Celman, Buenos Aires, 3-XII-1882 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10).

<sup>7468</sup> marido de Catalina Figueroa Güemes; padre del Ministro de Gobierno Luis Avelino Costas; y abuelo materno del Gobernador y candidato a Presidente de la

---

República Robustiano Patrón Costas (Cutolo, II, 394).

<sup>7469</sup> Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7470</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7471</sup> J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 17-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7472</sup> en Jujuy el Irigoyenismo lo constituían los Conspícuos.

<sup>7473</sup> marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (Calvo, VI, 35). Era concuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda.

<sup>7474</sup> "...compuesto de la última clase social, la que incitada por el licor y por la impunidad, comete diariamente los desmanes que son consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a los que lo mueven" (Segundo Linares a J. Roca, Jujuy, 17-XII-1890, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61).

<sup>7475</sup> J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 17-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7476</sup> Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393.

<sup>7477</sup> ex-Presidente de la Legislatura. Anti-uriburista acérrimo y partidario de Juárez Celman. Una de las razones del prestigio de Pérez, "...ha sido siempre su estatura, que allí en Jujuy resulta colosal. Hombres retacones por el enrarecimiento del aire, los jujeños sentían un invencible respeto por este hombre gigante que debía bajar la vista para mirarlos" ("La reprise del Senador Pérez", *El Diario*, 1-V-1909).

<sup>7478</sup> Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7479</sup> Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7480</sup> Bolivia salía de la Guerra del Pacífico, y por tanto contaba con gran cantidad de excedentes en armamentos.

<sup>7481</sup> Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 22-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7482</sup> amigo del Gral. Napoleón Uriburu.

<sup>7483</sup> sobre Pacheco, ver Mendoza (1924).

---

<sup>7484</sup> Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7485</sup> Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7486</sup> Pío Uriburu a Luis M. Campos, 5-IV-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

<sup>7487</sup> J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>7488</sup> Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 19-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.216). Era hijo del Diputado Provincial Manuel Padilla y de María Bárcena Mendizábal; hermano del Vicario Pablo Padilla Bárcena; y cuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada y Macedonio Graz Zegada Gorriti.

<sup>7489</sup> ex-Diputado Nacional.

<sup>7490</sup> Carlos Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>7491</sup> Carlos Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>7492</sup> Nacido en Chilecito, La Rioja, hijo de Tadeo Carrizo y de Micaela Carrizo, y probablemente sobrino del Diputado Provincial por La Rioja Nicolás Carrizo. Don Nicolás Carrizo, descendiente de una familia de conquistadores, fué asimismo Ministro de Gobierno de Villafañe y de Rubén Ocampo; y Gobernador Delegado en 1868 y 1877. Era sobrino del Gobernador Francisco S. Gómez (Cutolo, II, 168). Teodosio Temístocles Carrizo fué Profesor del Colegio Nacional en 1880, año en que fué víctima de persecuciones políticas por parte del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante, y de un atentado contra su vida (Domingo T. Pérez a Julio A. Roca, Alisos, 16-X-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.12). Fué designado Procurador Fiscal de Jujuy en Junio de 1905, y era casado con Eloisa Rueda Castañeda, viuda del Cnel. Julio Iriarte, hija de Angel Rueda y de Genara Castañeda, poseedores de una finca en San Pedrito, Jujuy.

<sup>7493</sup> Un año más tarde, en 1885, Soriano Albarado le informaba a Rocha que en el día de la bandera el Ministro Tello "...en una febril disputa sobre la histórica bandera con el Vice-Rector Seballos le dió a este un empujón acompañado de palabras depresivas, que fué correspondido con un tremendo bofetón, agarrándose acto continuo de los cabellos furiosamente hasta que fueron apartados. Este inaudito y vergonzoso incidente fué la coronación de célebre fiesta, y por cierto la corona cívica que lo haga acreedor a Tello a una banca en el Senado Nacional" (Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 10-VII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). El año anterior, el Ministro Tello le había enviado a Roca una carta donde le informaba que la explicación de que Jujuy fuera "...la provincia que menos disgustos le ocasiona, [obedecía a que] hay dos partidos, el uno del pueblo, a que pertenezco yo, y el otro llamado Conspicuo precidido por D. Plácido Sánchez de Bustamante; como este Sr. es mi padre político no levanta resistencias y me deja gobernar en paz; de lo contrario ya estaríamos ardiendo, porque la gente es belicosa"

---

(Eugenio Tello, a J. Roca, Jujuy, 4-IX-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.40).

<sup>7494</sup> T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 15-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>7495</sup> Eugenio Tello a J. Roca, Jujuy, 7-IV-1883 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.30).

<sup>7496</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7497</sup> hijo del Gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo Latorre; y cuñado del Gobernador Luis Linares Usandivaras (GP.1907-10).

<sup>7498</sup> Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola Otero (Cornejo, 1983, 270).

<sup>7499</sup> Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.486).

<sup>7500</sup> Francisco Alsina a Victorino de la Plaza, Salta, 7-VI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.528).

<sup>7501</sup> Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 5-1-4, fs.43).

<sup>7502</sup> Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 11-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.434).

<sup>7503</sup> hijo de Silverio Chavarría y Moldes y de Dolores Saravia; y marido de Mercedes Llovet Cronejo.

<sup>7504</sup> su mujer Benjamina Solá y Chavarría y su hija Benjamina Aráoz Solá, mujer de Nicolás Arias, fueron asesinados por José Domingo Santos o Reyes en Salta (Laplaza, 1950, 42).

<sup>7505</sup> Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.486).

<sup>7506</sup> Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz y sobrino carnal del Diputado Provincial Marcos Figueroa (Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.394).

<sup>7507</sup> hijo del Cnel. Juan Bonifacio Ruiz de los Llanos y de Agueda San Roque (Calvo, VI, 265).

<sup>7508</sup> historiador nacido en Salta, Diputado Provincial, autor de Apuntes históricos de la Provincia de Salta en la época colonial (1866-1870) (Cutolo, VII, 813).

---

<sup>7509</sup> Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.394).

<sup>7510</sup> Corbacho, Figueroa de Freytes, y Torino, 1978, 114.

<sup>7511</sup> Para Eduardo Wilde, Solá "...era militar. Rojo lo dejó de Jefe de Frontera, siendo Gobernador era también amigo de Victorica por quien tanto ha hecho el Presidente y que debía constituir otro vínculo mas con Solá. De todos los Gobernadores Solá es el que menos elementos propios de predominio tenía. Era y es soltero como Ortiz" (Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>7512</sup> Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>7513</sup> Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>7514</sup> Era "...soltero, rico e influyente" (Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15). Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 a los 97 años de edad. Era hijo de Francisco de Paula Ortiz y de Azucena Alemán Tamayo, y primo hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola, y de Miguel S. Ortiz Viola (Cornejo, 1983, 131-135; y Platt, 1995/96).

<sup>7515</sup> Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 29-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216). El 6 de Febrero de 1886 Francisco J. Ortiz le expresaba a Martín G. Güemes que "...aquí se tienen muchos datos positivos sobre la mala fé de las cuentas del Jefe de la frontera; pero todo podrá arreglarse satisfactoriamente si Juan Solá renuncia el gobierno. Usted debe empeñarse en eso y asegurarle que Roca se dará por satisfecho y que será propuesto para general, que es lo que le conviene, y que perderá hasta su crédito si se empeña en ser Rochista. Se sabe que anda por enredar las cuentas de Jujuy, pero no lo conseguirá. Usted puede salvarlo aconsejándolo bien. Recuerdos de Roca" (transcripta en El Nacional, sábado 19-VI-1886).

<sup>7516</sup> "...comprenderás fácilmente lo difícil que ha sido para nuestro amigo [Cnel. Baldomero Lamela], el disciplinar un cuerpo, al cual no lo podía reunir y cuyos oficiales, en su mayor parte inservibles estaban acostumbrados a cometer toda clase de faltas impunemente, contando con el apoyo de un superior a Lamela, como era el Jefe de la Frontera Cnel. [Juan] Solá. Estas causas, la existencia de algunos malos oficiales en el Regimiento que quizá estén comprometidos en la sublevación y la política misma han sido los móviles de la sublevación del Escuadrón, que tuvo lugar el 8-IX-1886. Y no tengo duda que la política ha obrado directamente, pues de la declaración de algunos soldados se ha sabido que el Gral. [Napoleón] Uriburu, tuvo algunas conferencias en su casa, en la Ciudad de Jujuy, con el cabecilla de la sublevación, un Sargento Pereira, que perteneció al doce de Caballería cuando dicho General era su Jefe. Cabecilla que al entrar a esta ciudad con la soldadesca desenfrenada hacía vivir a Rocha, entre los gritos de júbilo que lanzaban al entregarse al pillaje y que vino a mi casa a la cabeza de los insurrectos en mi busca, gritando que quería apoderarse de mi cabeza y lavar sus manos en mi sangre. Cuando este vandido llegó a mi casa, yo había tenido tiempo de apretarme el gorro y no encontrando mas que a mis peones, porque el pájaro se le voló, punzaban a estos con sus sables

---

queriéndolos obligar a dar vivas a Rocha y como estos se negaron a ello les sobaron los lomos con una soberana paliza. Estos vandidos que han saqueado esta zona de la Provincia inducidos por un Teniente de Rocha, nos han dado, desgraciadamente para nosotros, una prueba gráfica de lo que hubiera sido nuestro pís si nuestra fatalidad hubiera entronizado a éste en el poder con hombres que no han vacilado un momento en entregar a poblaciones indefensas al saqueo y a dejar en la mayor indigencia a muchas familias, para satisfacer ambiciones ruines e ilegítimas" (Angel Quirós a J. Roca, Orán, 4-X-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.55).

<sup>7517</sup> al hacerlo Solá no entregó "...los 20.000 tiros, armas y pertrechos pertenecientes al Regimiento que manda Lamela y que él conserva indebidamente sirviéndose de ellos para los planes que abriga" (J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 23-V-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. C., Leg.23).

<sup>7518</sup> Linares Quintana, 1942, II, 377.

<sup>7519</sup> Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 15-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7520</sup> Pío Uriburu a Dardo Rocha, Salta, 10-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.

<sup>7521</sup> hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de su prima Mercedes Aráoz Figueroa; y sobrino del Gobernador Cnel. Alejandro Figueroa.

<sup>7522</sup> Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 17-X-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

<sup>7523</sup> Angel Ovejero a F. Rocha, Salta, 21-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7524</sup> Abel Toro a D. Rocha, Salta, 20-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7525</sup> Delfin Leguizamón a D. Rocha, Salta, 24-X-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7526</sup> Desde Salta, en marzo de 1886, en vista de que el Gobernador Solá mantenía la neutralidad y no consentía que se hiciera nada en favor de la candidatura de Juárez Celman, y ante la inevitabilidad del triunfo de Rocha, Benjamín Mollinedo le escribía a Juárez Celman que "...nos hemos propuesto evitar que tengan lugar las elecciones de Abril en 8 o 10 Departamentos; pues estando dividida la provincia en 21 secciones electorales, necesitamos evitarlas en aquel número para que no hayan los dos tercios de actas, resultando de este modo la elección nula...con el concurso del Dr. Martín G. Güemes, los Ortiz y alguno de los Figueroa, que son los que están en el secreto, es posible obtengamos el éxito deseado. En pocos días mas, tendrá lugar la insaculación de escrutadores y verificada esta, recién le avisaré a Vd. de una manera definitiva, si los 12 votos de Salta han de ser para Rocha o por el aire" (Benjamín Mollinedo a J. Celman, Salta, 5-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

---

<sup>7527</sup> Luis del Carril a D. Rocha, Salta, 20-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>7528</sup> régimen en el cual los individuos pertenecientes a un núcleo central participan de iguales afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con la misma gente (Ross, 1995, 68).

<sup>7529</sup> hermano y concuñado del Gobernador Manuel José Navarro Herrero (GI.1869); y suegro del Gobernador Joaquín Acuña Molina (GP.1881). El Gral. adolecía a juicio del Comandante Daza "...del defecto de ser muy confiado y sin reserva en sus ideas y despreocupado en los asuntos de esta Provincia, él pasa la mayor parte del tiempo retirado en sus estancias y por consiguiente cualquier politiquero le puede explotar su estremada buena fê" (José S. Daza a J. A. Roca, Catamarca, 31-VIII-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>7530</sup> A juicio de Francisco Caracciolo Figueroa, la Casa Molina era "...conocida de todos que esta jente es de número y cálculo, oligarquía del tiempo de Rosas, aneja y carcomida que nada vale hoy como influencia" (Francisco C. Figueroa a J. A. Roca, Catamarca, 12-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>7531</sup> Pbro. José F. Segura a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>7532</sup> "...No atreviéndose a imponer su voluntad como han tenido la costumbre, de hacerlo ni contando con mayoría en el Comité Roquista, por estar en él dos hermanos del Candidato resolvió éste por decisión del Presidente Gral. Navarro que la Asamblea decidiese, pero como tampoco en esta la [mayoría] tenían pretendían que en la Asamblea debían tener entrada toda persona amiga, de modo que hasta las multitudes que asisten a una elección debían concurrir a ella. Ante tan absurda pretensión hubo una discusión acre en que se hicieron terribles ataques a la Casa Molina que casi produjo una escisión. Conociendo por varios amigos que la Casa Molina decía si yo salía electo, habían de luchar me apersoné al Gral. Navarro para decirle que estaba resuelto a declinar mi candidatura con tal de que se levantase un Roquista decidido y le indiqué a su mismo yerno y a varios otros. El Gral. en una conferencia que tuvieron con el Dr. Navarro, el Gobernador y D. Niceo Acuña, Gerente de la Casa Molina hermanos, acordaron aceptar mi indicación y levantar la candidatura de mi hermano, si este aceptaba, y en su defecto la de D. Niceo Acuña, pidiéndome a los dos candidatos enviáramos por escrito nuestras renuncias. En su consecuencia hice mi renuncia con el carácter de indeclinable y el Dr. Acuña también, pero sin ese carácter, todo esto ocurrió en la noche del 29 del pasado; pero con gran sorpresa el primero se invitó a la Asamblea para esa tarde y aunque nuestros amigos tenían algo jamás creyeron que sería para nombrar al Dr. Acuña candidato" (Francisco Figueroa a J. Roca, Catamarca, 6-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>7533</sup> Diputado Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.193.

<sup>7534</sup> Perteneciente a la coalición navarro-molinista (Rato de Sambucetti, 1980, 433), fué padre del Diputado Nacional Manuel V. Rodríguez Bustamante (DN.1878-82; 88-92).

---

<sup>7535</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28.

<sup>7536</sup> *Ibídem*.

<sup>7537</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>7538</sup> José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 31-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). En *La Patria Argentina*, de abril de 1883, se transcribe una nota bajo la denominación de "Noticias Judiciales", donde se dice que "La Suprema Corte de Justicia Federal ha resuelto un ruidoso pleito en que figuran como litigantes el Gral. Octaviano Navarro y la familia Molina de Catamarca. Esta reclamaba una considerable extensión de campos hoy en poder del primero. El Juzgado Federal de Catamarca falló este asunto en contra de la familia Molina y la Corte acaba de revocar esa sentencia ordenando poner a aquella en posesión de los referidos campos con lo que hayan producido desde la fecha en que indebidamente los ocupó Navarro" (*La Patria Argentina*, 24-IV-1883, año V, n.1575).

<sup>7539</sup> hijo de Tadeo Acuña y Vera, y de Magdalena Molina Bazán; sobrino del Diputado Nacional Pedro Ignacio Acuña; marido de Ana Navarro Cano; y cuñado del Diputado Nacional Dermidio Ocampo y Lema.

<sup>7540</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 23-IX-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

<sup>7541</sup> hijo del Gobernador Javier Castro Salado (GP.1858); y marido de Julia Ruzo, hija del Gobernador Benedicto Ruzo Acuña y de Eloisa Rivas (Cutolo, II, 228; y VI, 506; y Zinny, 1920, IV, 343, y 364).

<sup>7542</sup> hijo de Manuel Antonio Figueroa y de Romualda Herrera Acuña; y hermano del Senador Nacional Francisco Caracciolo Figueroa Herrera (SN.1892-1910).

<sup>7543</sup> José María Figueroa a J. Roca, Catamarca, 4-IV-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37).

<sup>7544</sup> "...En la noche del Jueves se resolvió como lo deseábamos, con extrañeza de que Rodríguez aceptase que la Asamblea decidiese; pero había sido el caso que él sabía que los Castristas trabajaban por el Dr. Castro dando por pretesto una carta del Ministro Ortiz a Castro en que le decía que en mérito del voto de Mauricio [Herrera] en la cuestión Seminarios me creía que su candidatura no cuajaría, lo que sabido por mí la mañana del día siguiente escribí una carta a Castro quien me contestó ratificando su desistimiento, entre otras causas porque Mauricio lo había desligado del compromiso por renuncia voluntaria que había hecho. Fué este desistimiento lo que ha producido escisión en la oposición porque habiéndose convocado la asamblea para la noche del mismo día (viernes 17) era imposible acordarse sobre un candidato, tanto mas cuanto Rodríguez había propuesto al Dr. Castellanos como candidato de él haciéndole nacer celos contra mí por haber aceptado la candidatura de Mauricio que la rechazaba él, Moreno, Castellanos y varios amigos de Castro. Como yo no era partidario que se presentase lista de candidatos y por otra parte estaba fastidiado con la conducta de desistir a última hora de la candidatura de Mauricio

---

declaramos que no asistiríamos a la Asamblea, como en efecto sucedió, habiendo concurrido solo unos cuantos amigos nuestros que no pudieron saber lo que ocurría. La Asamblea reunida proclamó una lista de 4 personas para que eligiera de entre ellos el Presidente incluyendo en la lista al Mayor Daza. Los otros candidatos son: Javier Castro, Dr. Castellanos y M. Figueroa: tal es el estado de nuestras cosas y el único acto que se produce desde la venida del Interventor [Onésimo Leguizamón] que no hace otra cosa que pavonearse y hablar en público cosas que á conocerse por la prensa de Buenos Aires le darían duro al Presidente de la República y al Interventor, pues ha declarado en un banquete que si la situación y la oposición no convienen en un candidato él lo impondrá en nombre del Presidente, llamando al mismo tiempo desgraciados a los que se comprometen con este o aquel candidato a la Presidencia, porque Roca haría al que se le antojara y aún no había manifestado su opinión. Se dice aquí que los situacionistas aceptarían a Daza y alguno de ellos afirma que gobernará con la situación ¿Qu sucederá es cosa que Vd. podrá saberlo mejor allí. Mi creencia es que el desistimiento de Castro por Mauricio un grave error pues debemos nombrarlo sin perjuicio de variar más tarde si es que el Presidente no gustaba de esa candidatura pues no me cabe duda que Mauricio mismo hubiera renunciado a la menor indicación del Presidente o de sus amigos" (Francisco C. Figueroa a Miguel Correa, Catamarca, 20-X-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

<sup>7545</sup> Francisco Caracciolo Figueroa a Victorino de la Plaza, Catamarca, 28-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>7546</sup> Ezequiel López a Juárez Celman, Catamarca, 8-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7547</sup> En Diciembre de 1883, Juárez Celman se alegra que Roca "...participe de la antipatía que me inspira la persona de tan inflado mulato" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 20-XII-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>7548</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.193.

<sup>7549</sup> Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 25-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>7550</sup> Para el Gobernador Sargento Mayor José Silvano Daza, el Dr. Irigoyen

"...padecía de una gran equivocación al creer y contar como herencia oligárquica la Provincia de Catamarca, error imperdonable en un hombre serio y avezado en los juegos políticos de nuestro país, pues ha sido engañado por tres o cuatro ambiciosos y esplotadores de una manera grosera y sin consideración" (José Daza a J. Roca, Catamarca, 16-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.47).

<sup>7551</sup> "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el joven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

---

<sup>7552</sup> "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el joven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7553</sup> "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el joven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7554</sup> "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el joven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). Si no ha habido la intención de soplarle la dama al candidato José S. Daza, con que fin se preguntaba Marcelino Guiol, "...¿se ha cambiado la lista, faltando vergonzosamente a un compromiso tan serio?" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). Guiol no creía que este procedimiento

"...responda a que tal o cual fracción se hubiera querido llevar la vanagloria de poder decir '...yo he demostrado que gozo de más prestigio que los demás', porque sería una tontería siendo que llegaba al mismo fin, esto respondiendo al candidato pactado [Daza]" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

Por todos estos motivos, Guiol creía "...que hay gato y que ese gato sacará las uñas en el momento de la elección, y quien sabe si no lo arañan al pobre Daza!" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

<sup>7555</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7556</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7557</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7558</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7559</sup> Presidente del Centro Unión Catamarqueña (Frías, 1985, 220).

---

<sup>7560</sup> Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

<sup>7561</sup> primo o sobrino del Diputado Nacional Dermidio Ocampo Lema (DN.1862-66).

<sup>7562</sup> Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

<sup>7563</sup> José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>7564</sup> cuñado del poderoso dueño de ingenios azucareros Clodomiro Hileret.

<sup>7565</sup> José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>7566</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.53).

<sup>7567</sup> hijo de Felipe Leguizamón Gauna, nacido en Salta, y de Gualberta del Llano, chilena; y marido de Elena Ovalle y Aragua, hija del primer presidente de Chile (Bazán, 1992, 333).

<sup>7568</sup> O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>7569</sup> hijo del Coronel Lucio Almonacid y Segura y de María Almonacid, y casado con Esmeralda Castro y Castro, hija de Miguel Castro Almonacid y de Azucena Castro Peñaloza (Calvo, V, 40; y Pizarro, 1883, 41).

<sup>7570</sup> padre del Candidato a Gobernador Florentín Barros Meléndez.

<sup>7571</sup> Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 17-IV-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>7572</sup> J. Vicente de la Vega a J. Roca, La Rioja, 15-XII-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13).

<sup>7573</sup> hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien había descollado en la defensa de La Rioja contra el sitio del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa González, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro (Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era tío del Diputado Nacional José María Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos, y primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera.

<sup>7574</sup> Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Córdoba, 3-IX-1882, AGN, Archivo Roca, Leg.26.

---

<sup>7575</sup> Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Córdoba, 3-IX-1882, AGN, AR, Leg.26.

<sup>7576</sup> Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman, Buenos Aires, 1882, AGN, AJC, Leg.11.

<sup>7577</sup> Bazán, 1979, 505. Ante la disyuntiva de quién sería Gobernador de La Rioja (o Bustos o Florentín Barros), Juan Pedro Albarracín le insistía Luis Cané que debía ser este último, pues "...hay que contentar a todo trance al padre de Barros, pues es Senador Irigoyenista, para contar con su voto en el Senado" (Juan Pedro Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Sin el voto de Barros, "...quedamos con diez votos en contra y nosotros con nueve; pueden pues hasta impedirnos la entrada de los Senadores nuevamente electos" (Juan Pedro Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Por el contrario, con Barros "...tendríamos diez votos contra nueve; he ahí porque yo mandaría hasta un ejército para hacer triunfar a Barros en La Rioja" (Juan Pedro Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>7578</sup> J. Ocampo y F. V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 3-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>7579</sup> En carta a Roca, Francisco V. Bustos le expresaba que "...V.E. sabe cuanto la guerra civil ha relajado la moral, el respeto a las leyes y cuán difícil es hacer cumplir estas en su dilatada y casi desierta campaña, en donde el bandalaje tiene su imperio que la impotencia o el criminal desconocido de las autoridades no ha sabido moderar a tiempo" (Francisco V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 10-XI-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13). Y en carta a Victorino de la Plaza, José M. Fernández le expresaba que "...Vd. debe comprender de que la vida de La Rioja es semi salvaje en donde se carece de toda clase de goce y aún de sociedad que es parte de la vida; dicho pueblo es una especie de toltería de indios donde sus hombres pasan el tiempo con chismes y cuentos he intrigándose entre ellos unos con otros porque son corrompidos en privado y en política" (José M. Fernández a V. de la Plaza, Paraná, 18-VIII-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392). Sin embargo, Guillermo San Román y otros rochistas habían fundado el periódico La Defensa

"...que está destinado a dar el último golpe al Roquismo, débil y agonizante de antemano, porque sólo tiene vida pura y exclusivamente en algunos elementos oficiales de la Provincia y en el Cuartel de Enganche de esta ciudad" (Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 23-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

Era La Defensa, a juicio de San Román,

"...un arma formidable, porque ejerce influencia directa e inmediata sobre la masa de población de la Provincia, especialmente sobre el paisano de la campaña que no lee otro papel impreso" (Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 23-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7580</sup> Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>7581</sup> abuelo del historiador Alfredo Díaz de Molina.

---

<sup>7582</sup> Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>7583</sup> Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>7584</sup> hijo de Amaranto Ocampo y Dávila y de Solana Brizuela y Doria; y hermano del Gobernador Rubén Ocampo (Serrano Redonnet, 1979, 190-191; Zinny, 1920, IV, 100; y Cutolo, V, 104).

<sup>7585</sup> J. Ocampo y F. V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 3-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>7586</sup> hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396).

<sup>7587</sup> G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7588</sup> seguidores del Gobernador Francisco Vicente Bustos.

<sup>7589</sup> O. E. Pereyra a Juárez Celman, La Rioja, 30-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.18. Benjamín Sastre era un Jefe de Infantería, que se había destacado peleando en ambas Santa Rosas (Cutolo, VI, 737). Y el Dr. Bazán alcanzó a ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>7590</sup> hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396).

<sup>7591</sup> G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7592</sup> Sobre la decapitación de Murillo en La Paz en 1809, ver Choque Canqui, 2007. Hay quienes atribuyen el ajusticiamiento de Cabeza de Tigre a una represalia contra la inmolación de Pedro Murillo ocurrida en La Paz en 1809. Para la historia de la revolución de 1809 y la vida de Murillo, ver Ponce Sangines y García, 1953-54.

<sup>7593</sup> Para la legitimación carismática en Weber, ver Falco, 1999, 78-86

<sup>7594</sup> Allub, 1989, 115. Los denominados sarracenos o beneméritos hallaron su continuidad en los llamados mazorqueros, o partidarios del federalismo Rosista; y los titulados ministeriales en los unitarios.

<sup>7595</sup> en Tucumán (Bernabé Aráoz, Javier López, Alejandro Heredia y Marco Avellaneda), en Santa Fé (Domingo Cullen), en Buenos Aires (Manuel Vicente Maza), en Catamarca (José Cubas), en La Rioja (Grales. Facundo Quiroga y Tomás Brizuela), en Mendoza (los Moyano) y en Corrientes (Berón de Astrada).

<sup>7596</sup> Sobre la decapitación de Murillo en La Paz en 1809, ver Choque Canqui, 2007. Hay quienes atribuyen el ajusticiamiento de Cabeza de Tigre a una represalia contra la inmolación de Pedro Murillo

---

ocurrida en La Paz en 1809. Sobre la Conspiración de Alzaga y su trágico fin, ver Quesada, 1936; Gandía, 1960; Williams Alzaga, 1962. y Lozier Almazán, 1998.

<sup>7597</sup> Sobre el fusilamiento de los hermanos Juan Jose y Luis Carrera, ver Campos Harriet, 1974, 87-94. Sobre la renuencia de los hermanos Carrera a prestar la confesión en sus últimos momentos de vida, testimoniada por el Padre José Benito Lamas, ver Bruno, 1994. Las dudas despertadas sobre la responsabilidad de San Martín en el ajusticiamiento de los hermanos Carrera no residen en la muerte de José Miguel Carrera, dado que en esa oportunidad estaba entrando en Lima, sino en la previa muerte de sus dos hermanos menores ocurrida en 1818, pues sólo debido a la intercesión de la esposa de uno de ellos San Martín envió a Mendoza un pedido de sobreseimiento, que llegó un día después del infausto evento (Raffo de la Reta, 1941, 214). Sobre la responsabilidad de Monteagudo en el hecho, como Auditor de Guerra del Ejército de Chile, ver Pérez, 1954, 84, nota 12; y pp. 87-88, nota 15. Sobre los descargos de San Martín a las acusaciones de José Miguel Carrera, ver Pérez, 1954, 89, nota 16.

<sup>7598</sup> Sobre la muerte del chileno Manuel Rodríguez, ver Latcham, 1975.

<sup>7599</sup> Sobre la sublevación realista de 1819 en San Luis, ver Raffo de la Reta, 1941, 245-253; Pastor, 1935, 169-180; y Pérez, 1954, 103-105.

<sup>7600</sup> Sobre la Conspiración de los Franceses en 1819, ver Pérez, 1954, 105-107; Hammerly-Dupuy, 1958; Fitte, 1966; Labastie, 1966; y Ocampo, 2007, 334-337 y 372.

<sup>7601</sup> Ocampo, 2007, 329-331, 335, 372 y 395. Para el terror que una expedición española desembarcara en 1819 en Buenos Aires, ver Gandía, 1973. Sobre los planes españoles para reconquistar Hispanoamérica, 1810-1818, ver Heredia, 1974.

<sup>7602</sup> Sobre la traición de Inchausti, Fuentes y Moya, quienes habían escuchado la conversación en francés entre Carrera y Manuel A. Pueyrredón, donde el primero aseguraba su interés de refugiarse en los Estados Unidos, ver Pérez, 1954, 315. Sobre el fusilamiento mendocino de don José Miguel Carrera y su dudosa y discutida autoría intelectual, ver Vicuña Mackenna, 1857; Raffo de la Reta, 1941, Pérez, 1954, 305-331; López Blanco, 1970; Fitte, 1977; y Galmarini, 2006, capítulo X, 201-220. Sobre el misterio de la suspensión de la contraorden dada por el Gobernador Tomás Godoy Cruz respecto al fusilamiento de J. M. Carrera, ver Pérez, 1954, 327 y 329. Sobre la desaparición del proceso de fusilamiento de don José Miguel Carrera de los archivos de gobierno de Mendoza, ver Hernández, 1934, 9-28.

<sup>7603</sup> Encina, 1985, 139, citado en Galmarini, 2006, 209; y Raffo de la Reta, 1941, 232.

<sup>7604</sup> Sobre el conflicto social, la militarización y el poder en Salta durante el gobierno de Martín Miguel de Güemes, ver Mata de López, 2004.

<sup>7605</sup> Bustos se había sublevado un año antes en Arequito conjuntamente con el tucumano Alejandro Heredia.

<sup>7606</sup> Ver Carranza, 1941.

<sup>7607</sup> Sobre la significación de Juan Lavalle en Sobre Héroes y Tumbas, ver Alazraki, 1984.

<sup>7608</sup> Raffo de la Reta, 1941, 214-222. Sobre la transición de un liberalismo radical a un desencanto conservador en el ideario de Monteagudo, ver Coelho Prado, 2003.

<sup>7609</sup> Sobre la división del federalismo radicalizado a comienzos de la década del 30, ver Herrero, 2006, 93-111.

<sup>7610</sup> ver Muñoz Moraleda (1991).

<sup>7611</sup> sobre la muerte de Facundo, ver Newton, 1974; Zárate, 1985; y Fernández Latour de Botas, 1996.

<sup>7612</sup> Pagano, 1992, 263-282.

---

<sup>7613</sup> Sobre el asesinato de Cullen y el bloqueo francés de 1838, ver Busaniche, 1934; y Busaniche, 1939, 113-126.

<sup>7614</sup> suegro del Gobernador de Buenos Aires Valentín Alsina.

<sup>7615</sup> Sobre vida y muerte de Manuel Vicente Maza, ver García Enciso y Arias Incollá, 1986.

<sup>7616</sup> ver Méndez Avellaneda, 1977.

<sup>7617</sup> ver Segreti, 1991-92. Sobre las muerte de Acha, Avellaneda, Lavalle y Cubas, ver Agote Robertson, 1977.

<sup>7618</sup> el ex-Virrey Santiago de Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha, Santiago Alexo de Allende y Victorino Rodríguez, perdieron la vida a manos de un pelotón de fusilamiento dirigido por el Teniente Coronel Juan Ramón Balcarce.

<sup>7619</sup> Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

<sup>7620</sup> Sobre la crisis del patriciado, y luchas y venganzas de clan o familia en el nordeste brasilero, ver Aguiar da Costa Pinto, 1949; y Marques, 2002.

<sup>7621</sup> La desolación que la injusta muerte del Gobernador Bernabé Aráoz produjo en las filas de la familia Aráoz, hizo que el General Gregorio Aráoz de la Madrid derrocara por la fuerza en 1825 al General Diego Aráoz. En carta dirigida a Don José Uriburu, (a) "Povedón", el General Juan Antonio Alvarez de Arenales le expresaba "...sabes el rencor que conserva toda la familia de los Aráoz a que pertenece Madrid: toda ella ha de influir a que haga extender su anarquía y la vengue" (Juan Antonio Alvarez de Arenales a José Uriburu, Salta, 4-XII-1825, AGN, Sala VII, Archivo Arenales, Caja 9). Generalizada la guerra civil, las provincias del norte sufrieron una traumática caída demográfica. Tucumán fue desangrada en la batalla del Rincón (1827), donde Facundo Quiroga derrotó a Gregorio Aráoz de Lamadrid (García de Saltor, 1997). La despoblación de las provincias del Norte, según el General Alvarez de Arenales "...ha sido enorme, como se ve por los censos que se están acabando, en un grado que nos ha sorprendido. Se ha perdido más de un tercio de su población, incluyendo en el cálculo al Departamento de Jujuy, que ha sido el más destruido" (Salta, 2-IV-1826, AGN, Sala VII, Archivo Arenales, Caja 9, Documento 364). También fué grave la caída demográfica en Cuyo, pues sólo en San Luis, Miguel Rivera denuncia en su Diario "...que hoy sólo tendrá diez mil habitantes a causa de la guerra" (Rivera, 1958, 151). Al reducirse la frecuencia de los matrimonios entre los miembros de la elite tucumana, y por ende su tasa de natalidad, el Gobernador Alejandro Heredia --el mismo que perteneciendo por afinidad al clan salteño de los Cornejo ajusticiara al General Javier López-- decidió impedir el amancebamiento y el mestizaje de los miembros de dicha elite y superar su deficiente crecimiento demográfico, comparado con el de las clases subalternas, dictando una de las piezas jurídicas más originales de la legislación argentina: la Ley de Fomentos de Matrimonios (López Mañán, 1916, 49-62; y Pavoni, 1981, Capítulo II). A la luz de una concepción paretiana esta medida estaba destinada a frenar la circulación de la elite Tucumana (Ver Pareto, 1980, 29).

<sup>7622</sup> hijo de Javier Aráoz y Paz de Figueroa y Petrona Valderrama, perteneciente a la rama de los Aráoz de ancestros santiagueños (primos de los Ibarra y los Taboada por su común origen en la familia de los Paz de Figueroa).

<sup>7623</sup> descendía de Bartolomé Aráoz y del Campo, hermano del Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo. A diferencia de este último, Bartolomé no había participado de la subasta de los bienes Jesuíticos.

<sup>7624</sup> En el Cabildo de Tucumán el clan de los Aráoz estaba liderado por el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo, Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán y miembro del partido Ministerial, partidario del monopolio comercial español. Era hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y con cuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924,

---

286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre.

<sup>7625</sup> Jaimes Freyre, 1911, capítulo XV; Villafañe, 1953, 121-125; y García de Saltor, 1997.

<sup>7626</sup> Morales Guinazú, 1939, 237-238.

<sup>7627</sup> Los Dávila, que representaban la tendencia unitaria o centralista, radicada en Chilecito y ligada a la explotación minera del Cerro de Famatina, tenían como aliados y estrechos parientes a los Gordillo, los del Moral, los González, y los Castro Barros. Sus antagonistas, los Villafañe y los Ortiz de Ocampo, afincados en los Llanos, partidarios del federalismo artiguista, heredado del caudillo cordobés José Xavier Díaz, contaban con el apoyo y el consiguiente parentesco de los Carreño, los Luna, los de la Vega y los Bazán (Martínez Villada, 1940, 62; y Bazán, 1979, 249).

<sup>7628</sup> Güemes, 1980, VI, 463.

<sup>7629</sup> Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga (1824-25), t.III, n.43, p.53.

<sup>7630</sup> El Senador Rafael Igarzábal, en oportunidad de debatirse la intervención a Corrientes, en 1878, manifestó que: "...al dictarse la Constitución salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la tiranía" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.194). Para la intervención del gobierno de Buenos Aires en los asuntos nacionales durante el Rosismo, ver Tau Anzoátegui (1965).

<sup>7631</sup> en el debate acerca de la intervención a Corrientes, celebrado en 1878.

<sup>7632</sup> Senador Dalmacio Vélez Sársfield, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.160.

<sup>7633</sup> en el debate acerca de la frustrada intervención a Salta, acontecido en 1877.

<sup>7634</sup> Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, p.90.

<sup>7635</sup> Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.194.

<sup>7636</sup> Coleman, 1957; Gluckman, 1955; y Colson, 1953 (ver Ross, 1995, 68-71). Sobre motivaciones étnicas del conflicto, ver LeVine y Campbell, 1972; See, 1986; y Zulaika, 1990. A propósito de las motivaciones sociales y económicas en la violencia de las poblaciones campesinas y pre-industriales de Colombia, ver Williamson, 1965; Weinert, 1966; Schmidt, 1974; Booth, 1974; y Sánchez, 1985. Con referencia a la relación entre el bandolerismo y la política en la Colombia campesina, ver Gilhodès, 1976; y Sánchez y Meertens, 1981; en el Perú, ver Aguirre y Walker (1990); y en la Argentina, permítaseme citar a Saguier, 1997c.

<sup>7637</sup> Lambrecht, 1953-54; Young, 1965; Spencer, 1988; y Girard, 1995 (ver Ross, 1995, 99, 181 y 192). Sobre motivaciones religiosas y supersticiosas del crimen en Brasil e Irlanda, ver Vergara, 1953; y Lebow, 1978.

<sup>7638</sup> Klein, 1933; Whiting, 1965; Volkan, 1968; Whiting y Whiting, 1975; Lichtenberg, 1983; y Stern, 1991 (ver Ross, 1995, 82-106). Sobre motivaciones culturales y psicológicas en poblaciones campesinas y pre-industriales, ver Friedrich, 1964; y Schorr, 1974/76.

<sup>7639</sup> ver Licklider 1993; Kaufmann, 1996; y David, 1997.

---

<sup>7640</sup> para explicar la prevalencia de los golpes de estado en Bolivia, ver Canelas López, 1983; y para la previsión de su probabilidad en el África post-colonial, ver O'Kane, 1993.

<sup>7641</sup> sobre el ajusticiamiento de Liniers, permítaseme citar a Saguier, 1991-92. Acerca de la eliminación de Mariano Moreno, ver Dürnhöfer, 1993. Con referencia a la muerte de Facundo, ver Newton, 1974; Zárate, 1985; y Fernández Latour de Botas, 1996. Con relación a la muerte del Gral. Urquiza, ver Gadea, 1943. Para el asesinato del Mariscal Sucre y su repercusión en la historia de Colombia (1828-1848), ver McGann, 1950. Sobre el asesinato del Presidente García Moreno en Ecuador, ver Loor, 1955. Acerca del asesinato del ex-Dictador de Bolivia Gral. Melgarejo en Lima, ver Terán Erquicia, 1980. Sobre quién mató al ex-Presidente Hilarión Daza, ver Oblitas Fernández, 1982. Sobre la vida pública y la violencia urbana en Colombia (el asesinato de Gaitán), ver Braun, 1985. Sobre el asesinato del gran mariscal y Presidente del Perú don Agustín Gamarra, ver González-Prada, 1941. Sobre el motín de Quillota y la muerte de Diego Portales, ver Anríquez Nilson, 1995. Para el fusilamiento de 33 peninsulares en 1812 en el Río de la Plata, ver Di Meglio, 2006, 149.

<sup>7642</sup> permítaseme citar a Saguier, 1995.

<sup>7643</sup> Canelas López, 1982, 93, 95 y 125.

<sup>7644</sup> La política de San Juan, a juzgar por la opinión del corresponsal de *La Nación* en oportunidad del crimen del periodista José F. Echevarría, sucedido en la localidad de Desamparados (San Juan) en enero de 1902, presentaba rasgos permanentes bastante peculiares que la separaban de los modelos corrientes en otras provincias. En San Juan, la acción del gobierno contra toda tentativa opositora "...se ejerce por medio del agua. Tal como suena. Es sabido que el suelo de San Juan, extremadamente seco, solo ha podido hacerse productivo por medio de obras de irrigación, que en una complicada red de canales abarcan toda la provincia. Como el agua no abunda, cada propietario tiene derecho a una cantidad determinada y paga por el servicio una cuota proporcional. Esta distribución de lo que allí es un elemento esencial de vida y de riqueza está a cargo de juntas electivas a razón de una minuciosidad y exactitud verdaderamente matemática, para que la irrigación alcance a toda la provincia. En tales condiciones se comprende el formidable recurso que el gobierno tiene en sus manos para acallar toda resistencia. Aunque las Juntas administrativas son electivas, la influencia oficial tiene en su formación un poder decisivo, porque el sufragio es en todas sus manifestaciones una simple parodia. De este modo el gobierno viene a tener en su mano la distribución del agua, es decir, la fortuna o la ruina de los particulares. Cuando un opositor molesta, se le cierra el canal en sus campos. Si no los tiene y se opera sobre algún pariente más o menos próximo. Es una espada de Damocles suspendida sobre todos los propietarios. Por estos apuntes puede darse cuenta el lector de la relación que median entre el gobierno y la población de San Juan. Es así, con esta arma incontrastable que los círculos dominantes se han perpetuado más de veinte años en el poder, sofocando en germen toda tentativa de resistencia y manteniendo la disyuntiva de la sumisión o de la ruina a todos los elementos de arraigo de la provincia. Pero hay todavía otros recursos: el aumento de las cuotas de impuestos, las multas por la falta de conservación de los canales, las contribuciones de brazos para las obras de irrigación. Todos estos medios se emplean sin disimulos ni ocultaciones, obrando con la tranquila despreocupación del que explota un feudo propio ("La Situación de San Juan, El gobierno del agua. *La Nación*, Jueves 9-I-1902). Acerca de los cambios en la administración del agua de riego en Cuyo, ver Supplee, 1988, y 1993; y sobre el denominado torniquete del agua, ver Rodríguez, 1979; Lacoste, 1994, 60; y "Politiquería hidráulica", *El Diario*, 13-V-1909; y "El reparto de agua en San Juan", *El Diario*, 4-VI-1909).

<sup>7645</sup> régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

<sup>7646</sup> hijo de Zacarías Gómez y de Socorro Maso, casado en 1870 con su prima segunda Mercedes Dojorti, hermana de Eusebio Dojorti, naturales de Jáchal, y sobrino segundo del Gobernador Camilo Rojo Angulo (Cutolo, III, 332; y Videla, 1990, VI, 268). Combatió en la Guerra del Paraguay. Cuando joven vió frustrado su ingreso al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay al serle rechazada su solicitud de beca.

<sup>7647</sup> siendo los casos más notorios los de Sebastián Elizondo y Santos Guayama (ver Siri, 1945; y Carte, 1969).

<sup>7648</sup> quien a comienzos del siglo XX fué el promotor de la denominada Ley de Residencia (que expatriaba a los terroristas anarquistas).

---

<sup>7649</sup> Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Sala VII, Documentación Donada, Archivo Roca, Leg.37.

<sup>7650</sup> El emir designado por el Mahdi, Omán Digna, derrotó el 6 de Febrero de 1884 a un ejército de cuatro mil egipcios, de los cuales 2.373 fueron pasados por las armas (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.57, p.1407; y t.58, p.333). Para mayores detalles, ver Crabites, 1970; Preston, 1975; y Wingate, 1993. En cuanto a los Irlandeses, el Secretario para Irlanda Lord Frederick Cavendish, hijo del Duque de Devonshire y marido de una nieta del Primer Ministro William Gladstone, y su subsecretario Mr. Thomas H. Burke, fueron asesinados en el Phoenix Park de Dublin el 6 de Mayo de 1882 por los miembros de una sociedad secreta denominada "Los Invencibles", quienes al ser traicionados terminaron sus vidas ahorcados en 1883 (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.28, p.1968; y Enciclopedia Britannica, t.2, p.974). En cuanto a los atentados producidos por los anarquistas, bien vale recordar que tres años antes del crimen de Gómez, en 1881, fue asesinado el Zar de Rusia Alejandro II. Diez años más tarde, en 1894, fue asesinado el Presidente de Francia Sadi Carnot; en 1898 la Emperatriz de Austria Isabel de Habsburgo; en 1900 el Rey de Italia Humberto I; y en 1901 el Presidente de Estados Unidos William Mc Kinley (*The New Encyclopaedia Britannica*, v.I, p.244 y 371; y Lentz, 1988).

<sup>7651</sup> Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.37. Es acaso razonable pretender asignar a aquellos Sanjuaninos el derecho a contar en materia del derecho a la vida con un patrón cultural excepcional, es decir con una impunidad que los excluyera de las penas previstas en la legislación general.

<sup>7652</sup> Sobre la muerte de los Gobernadores Benavidez, Virasoro y Aberastain, ver Videla, 1962-1990. La muerte de Benavidez tuvo trágicas derivaciones, pues medio siglo después de ocurrida, en ocasión de las elecciones presidenciales de 1902, el periodista sanjuanino José F. Echevarría, redactor de El Censor, fué ultimado por el Comisario Marcos Silva, por haber referido que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, era hijo del matador del Gral. Benavidez (Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601). En el segundo combate celebrado en la Rinconada del Pocito, el Gobernador Antonino Aberastain fue ajusticiado por las tropas al mando del Coronel Puntano Juan Sáa, "Lanza Seca", enviadas en 1861 por el entonces Presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui (Videla, 1990, t.IV, Cap.X, secc.III, pp.643-666); y en el tercer combate celebrado en la misma Rinconada, el Coronel de Milicias Juan de Dios Videla derrotó el 5-I-1867 al Coronel del Ejército Nacional Julio Campos (Echagüe, 1865, 1924; Piccirilli, et. al., VI, 154-155; y Videla, 1990, t.V, Cap.VI, secc.IV, pp.517-519). El primer combate celebrado en dicho lugar, denominado de Las Leñas, ocurrió en 1825, en oportunidad en que el ex-Gobernador Salvador María del Carril invadió San Juan desde Mendoza (Videla, 1990, III, Cap.XI, Secc.IV, 647-664).

<sup>7653</sup> Videla, 1962-90, t.V, Cap.IX, secc.VI, pp.765-780. Videla Lima fue Ministro en la gobernación de Domingo F. Sarmiento. Por su matrimonio con Jesús Maradona, hija de Timoteo Maradona, entró a pertenecer al círculo beato. Conjuntamente con Benito Borda, Carlos Mansilla, Ambrosio Lezica y otros [incluido su cuñado Miguel Segundo Echegaray] revivió en San Juan en 1869 el Banco de Cuyo, que había cerrado sus puertas en Mendoza (Cunietti-Ferrando, 1989, 8). Videla Lima reaccionó contra la política de su predecesor José María del Carril, propiciando la derogación de la ley de confiscación de capellanías y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de supresión de conventos. Se individualizó como ejecutores del crimen al Chileno Benjamín García Aguilera, y a Juan López, Pablo López Montoro y otros criminales que respondían a Santos Guayama, y como instigador al afamado educador Vicente García Aguilera, hermano del ejecutor (Cutolo, VII, 616).

<sup>7654</sup> Myers, 1995, 107. Sobre la tesis de Sarmiento acerca de las llanuras que predisponen a los gobiernos despóticos, ver Altamirano, 1997, 90-91.

<sup>7655</sup> étnicas; lingüísticas; geográficas: centro-periferia, campo-ciudad; religiosas: iglesia-estado; y sociales: estamentos, clases media y alta, y pobres-ricos, formuladas por Rokkan (1970) y Panebianco (1982, 1988) (ver Bartolini, 1993, 220-224; Máiz, 1994, 105-106; y von Beyme, 1995, 161-162). Para explicar la presencia de Parsons y de Marx en Rokkan, ver Himmelstrand, 1986. El principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen, Napoleón Burgoa, era hijo del ex-Gobernador José Anacleto Burgoa, a quien también se lo había responsabilizado por la muerte, en 1841, de Francisco Narciso Laprida, el Presidente del Congreso de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin participar de un determinismo genético, no es de extrañar que --a la luz de las teorías de Melanie Klein (1933)-- en la personalidad o en el llamado self de Napoleón Burgoa, haya intervenido el rol de su padre (Roiz, 1992, 104).

---

<sup>7656</sup> Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37. A favor de la tesis de Cané acerca de la ingratitud del suelo como condicionante de la sequedad del alma de los Sanjuaninos, *La Prensa* informaba el Domingo 16-IX-1885, pocos meses antes del crimen de Gómez, que en el paraje denominado La Huerta y sus adyacencias, que fueron siempre los mejores campos de San Juan,

"...hoy se encuentran sin una sola planta de pasto por lo que los estancieros de ahí se veían precisados a sacar sus haciendas y traerlas a los Departamentos cercanos a la ciudad donde se tiene la alfalfa por el riego artificial" (Boletín Telegráfico, San Juan, en *La Prensa*, 16-IX-1885).

Paradójicamente, el principal sospechado de instigar el crimen, Napoleón Burgoa, estaba a cargo de la Inspección de Irrigación y Agricultura. Sin embargo, como desmentiendo las explicaciones físicas de Cané, el ex-Presidente de la Confederación Argentina Gral. Justo J. de Urquiza fue ultimado en una de las provincias más húmedas, Entre Ríos.

<sup>7657</sup> Nacido en 1848, hijo de Domingo Albarracín Castro y de Jesús Toranzos Iribarren, marido de Juana Gil Merlo, cuñado del Gobernador Anacleto Gil Merlo y del Diputado Nacional Estanislao S. Tello Videla, y concuñado del Gob. Vicente C. Mallea (Cutolo, I, 63; y Calvo, V, 32).

<sup>7658</sup> Entre quienes sostienen la independencia absoluta o ligera correlación entre los conflictos externos e internos se hallaban Otterbin (1968), Rummel (1968) y Tanter (1966) y entre quienes sostenían una correlación positiva entre ambos se hallaban Haas (1965), Sipes (1973), Hazelwood (1973), Wilkenfeld (1968, 1973) y Stohl (1980), todos ellos citados en Ross, 1995, 164.

<sup>7659</sup> el epíteto de gallinicidio fue acuñado por las denuncias de La Patria Argentina, órgano de prensa dirigido por José María Gutiérrez, que describe una típica acción inconstitucional y de visos terroristas, operada por el gobierno central, consistente en arrancar la renuncia de Gobernadores y funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, amenazas y alarmas.

<sup>7660</sup> ver Castello, 1984, 1991.

<sup>7661</sup> ver Achával, 1988.

<sup>7662</sup> Hijo del que fuera en 1841 Gobernador de San Juan, Coronel José Anacleto Burgoa, quien fué acusado de haber asesinado a Francisco Narciso Laprida, Presidente del Congreso Constituyente de 1816, y que participó en la batalla de Caseros del lado de Urquiza, y de Elina Quiroga. Marido de Eloísa Videla; hermano del Gobernador Carlos Burgoa Quiroga; y primo del Ministro de Gobierno de Santiago del Estero Mardoqueo J. Olmos (Videla, 1990, VI, 944; y datos gentilmente proporcionados por el nieto de Napoleón Burgoa, Don Guillermo Napoleón Burgoa, nacido en Buenos Aires y fallecido en febrero de 1998 a la edad de 87 años).

<sup>7663</sup> En 1879, el Dr. Segundo Benavidez fué despojado de su cátedra en el Colegio Nacional por el Ministro de Culto e Instrucción Pública Dr. Saturnino María Laspiur, en beneficio de Secundino Navarro, "Nacionalista y como hijo de Laspiur" (Segundo Benavidez a J. Roca, San Juan, 18-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>7664</sup> Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43).

<sup>7665</sup> certificados en la votación que en el Senado Nacional hizo sobre la intervención a Corrientes, solidaria con la propuesta del Senador Miguel Victorio Gelabert.

<sup>7666</sup> Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43).

<sup>7667</sup> hijo del Administrador de la Aduana Anacleto Gil Recabarren y de Juana Merlo Quevedo, y cuñado de los Diputados Nacionales Vicente Celestino Mallea y Juan Pablo Albarracín Toranzos (Calvo, V, 32; y Videla, 1976, IV, 731; y 1990, VI, 940). Para su biografía, ver Gil (1951).

<sup>7668</sup> Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43).

<sup>7669</sup> parafraseando a algunos teóricos de las Relaciones Internacionales cuando se refieren al actual proceso de desnacionalización, hay una similitud estructural entre el proceso de desprovincialización y el surgimiento

---

del orden político nacional.

<sup>7670</sup> sobrino del Gobernador José María del Carril, y marido de su prima hermana Elisa Cortínez, hija de Indalecio Cortínez y de Domitila Cortínez del Carril (Videla, VI, 1990, 941).

<sup>7671</sup> Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.12).

<sup>7672</sup> entre ellos su sobrino carnal Domingo Morón Cortínez.

<sup>7673</sup> Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 14-XII-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13).

<sup>7674</sup> Rafael Igarzábal a Julio A. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27).

<sup>7675</sup> había renunciado recientemente al gabinete ministerial del Gobernador de Santiago del Estero Pedro C. Gallo por suponerlo a este último inclinado a favor del Rochismo. Era primo del sospechado autor del crimen, Napoleón Burgoa (Videla, 1990, VI, 944).

<sup>7676</sup> hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional Severo Igarzábal; y primo hermano de los Gobernadores de La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1871-74).

<sup>7677</sup> Respecto a la popularidad del Rochismo en esas horas, en Octubre de 1882, la carta que sigue, firmada por Rafael Igarzábal, es suficientemente ilustrativa. Los juicios que corrían a la llegada de Igarzábal a San Juan "...eran que yo venía a trabajar por algún candidato a la Presidencia, y sabiendo de mi amistad con el Dr. Irigoyen unos decían que por éste, y reconociéndome ligado con Vd., otros decían que por el Dr. Juárez. Varios amigos míos y muy inmediatos a Gil me recibieron diciéndome que venía tarde, que aquí casi todo nuestro partido era Rochista y que con Gómez o sin él, o contra él, estaban decididos a trabajar oportunamente por el Dr. Rocha. Yo me empeñé desde el primer momento en demostrar que no pensaba en candidatos, pero siempre noté resistencia, por lo cual comencé a creer que esta sería mas bien a mi persona i que podría venir de Gil por creer que puede aspirar a ser reelegido Senador, y contrariar sus aspiraciones. Resolví pues, ser franco y declarar que yo no aspiraba y que aún contribuiría a la elección de Gil si el se entendía conmigo. Esto era quitarle a Gil hasta el último pretexto, sin embargo que yo sabía que hablando él íntimamente con algunos amigos había dicho que no había mas candidato que el Dr. Rocha" (Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7678</sup> Mardoqueo J. Olmos a J. Roca, San Juan, 28-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>7679</sup> íntimo amigo del Chileno Ramón Castañeda y enemigo de Napoleón Burgoa.

<sup>7680</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7681</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7682</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7683</sup> primo hermano del Comandante Nicolás Sánchez.

<sup>7684</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7685</sup> hijo de Pedro Doncel Aramburu y de Carolina Martínez; marido de Rosario Morcillo, hija del Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo; y tío y concuñado del que luego fuera Gobernador Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, VI, 232 y 405).

<sup>7686</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7687</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>7688</sup> Anacleto Gil a Julio A. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.24). Tanto la

---

conducta opositora de Gómez en el Senado, manifestada en su votación respecto a la intervención a Corrientes, favorable a la posición sustentada por el Senador Victorio Gelabert; como la de Vicente C. Mallea, en la Cámara de Diputados, fueron aprovechadas por sus adversarios Sanjuaninos para intrigarlo a Roca, calificando a la primera de "...desleal y aún traidora, ¿porqué le hacen oposición a su gobierno? ¿porqué abandonan hoy su único credo político, que les sirvió de sombra para colocarse donde están?" (Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 19-VI-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.23).

<sup>7689</sup> Anacleto Gil a J. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.24).

<sup>7690</sup> Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). Gómez, de naturaleza vivaz, no buscaría por el momento opositores al Presidente, porqué según Albarracín "...comprenderá que no podrá encontrarlos" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). Esta realidad obedecía a que "...una gran parte de nuestro partido goza de empleos rentados por la Nación, [y] otra de empleos rentados por la Provincia" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). De acuerdo a esa realidad de fierro, Gómez no podría

"...pedirle a nadie su adhesión y ayuda personal en perjuicio del interés personal de aquél de quien se reclama su cooperación, que está expuesto si lo sigue a perder la renta de que vive" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27).

<sup>7691</sup> Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27).

<sup>7692</sup> "...mala parentela y compadrito" (Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala III, Arch. Roca, Leg.30). Para Mallea, Moreno "...sueña con hacer Diputado Nacional a su padre espiritual el Chileno Castañeda y con vengarse de los situacionistas por la campaña desgraciada que emprendió al separarse de sus filas. Aborrece cordialmente a Burgoa, quien en igual sentimiento me parece que no le paga en mala moneda. Moreno sería entre el grupo proyectado el que evidentemente valdría mas, y si he de ser franco, le diré que a no ser por él la empresa de Igarzábal hubiese sido nuevamente un sainete" (Vicente C. Mallea a Julio A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.32).

<sup>7693</sup> A juzgar por Juan P. Albarracín, el Chileno Ramón Castañeda "...aspiraba a una Diputación Nacional y se convenció que en el Comité de 50 miembros del club solo contaba con 14 votos. !Como habría de mandar San Juan un Chileno a las Cámaras!" (Juan P. Albarracín a J. Roca, San Juan, 8-III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). Y a juicio de Napoleón Burgoa, Castañeda "...por ser Chileno carece completamente de opinión" (N. Burgoa a J. Roca, San Juan, 6-VI-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>7694</sup> Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29).

<sup>7695</sup> Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29).

<sup>7696</sup> Las reuniones que al efecto se organizaron no dieron resultado alguno, pues Burgoa sostenía "...que debemos tomar como elemento principal al partido Nacionalista [Mitrista] en masa y organizarlo" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Burgoa caía en esta estrategia

"...porqué cree que en nuestro seno [el Autonomismo] no tendrá el suficiente apoyo su [propia] candidatura y es poco patriota en esta parte porque no transije con nada que no sea conseguir su objeto" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).

Más aún, Burgoa tuvo la imprudencia de decir que Roca no aceptaría otra candidatura que la suya propia, lo cual perjudicaba la cuestión

"...pues entre los amigos políticos que el Presidente tiene aquí hay algunos que tienen sus aspiraciones y que creen merecer la confianza de él, y desde ya se les mata la esperanza que puedan tener" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).

---

Con la tesitura de Burgoa no estaban conformes, según lo manifestaba el Oficial de la Guardia Nacional Román Videla a Roca, entre muchos otros que no le nombraba, porque el propio Roca no los conocía, Rosauro Doncel, José P. Cortínez, y Hermógenes Ruiz, por cuanto "...el partido Nacionalista [Mitrista] será siempre nuestro enemigo y mucho mas tomado así en masa" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Cortínez y Ruiz, tenían sus aspiraciones al gobierno, y por otra parte tenían unirse a los Mitristas por no querer "...perder el sueldo y posición oficial de que gozan" (Napoleón Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 18-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).

<sup>7697</sup> Román Videla no lo creía necesario, pues la Guardia Municipal estaba al mando de su primo hermano el Comandante Nicolás Sánchez, el cual "...estará donde esté la autoridad Nacional" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). En San Juan todos creían que Sánchez era un elemento de Gómez pero según Videla se equivocaban, pero "...a nosotros no nos conviene desmentir esta creencia porque en este caso lo separarían de allí, perjudicando nuestros planes" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).

<sup>7698</sup> Con una mayoría relativa en la Legislatura [es decir sin los dos tercios],

"...acaba de hacer espulsar de ella a dos Diputados autonomistas, a D. Manuel J. Quiroga mi hijo político [de Guillermo Sarmiento] y ha Dn. Francisco D. Aguilar (Guillermo Sarmiento a Julio A. Roca, San Juan, 16-V-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.31).

A juicio de Rafael Igarzábal,

"...no se han contentado con destituir a más de veinte empleados, ahora destituyen Diputados porque son simple mayoría, para hacerse de dos tercios que no tenían y ponen centinelas de vista en casas de nuestros amigos, probablemente para colgarles una revolución y meterlos en la cárcel. Ni el Jurado quieren dejar en pié, es para hacer otro y cerramos la Imprenta mañana" (Rafael Igarzábal a Julio A. Roca, San Juan, 20-V-1883, Archivo Roca, Leg.31).

<sup>7699</sup> N. Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 11-VI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.31.

<sup>7700</sup> Cordobés, nacido en junio de 1833, casado con Cristina Cook Barrera, padre de Rosario Morcillo, mujer de Rosauro Doncel Martínez; y de Dolores Morcillo, mujer de Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, VI, 405).

<sup>7701</sup> A. Belín Sarmiento a Dardo Rocha, San Juan, 12-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.

<sup>7702</sup> Guillermo Sarmiento a J. Roca, San Juan, 16-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>7703</sup> Juan P. Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 22-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35.

<sup>7704</sup> propiedad de un tal Nicanor Garramuño.

<sup>7705</sup> Diario fundado por Domingo F. Sarmiento en 1839, desaparecido a los pocos números y vuelto a aparecer después de Caseros (ver Galván Moreno, 1938, 399-407). En tiempos de Roca, en San Juan, se disputaban la opinión pública, los periódicos *El Ciudadano*, de filiación Rochista, La Libertad, de filiación Irigoyenista, y *El Zonda*, "...que no comprometía opinión, haciendo ver que no tenía candidato" (Rato de Sambucetti, 1980, 419).

<sup>7706</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>7707</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>7708</sup> Fué en Caucete donde los dos grupos opositores, nacionalistas Mitristas y autonomistas disidentes, ante la eventualidad de la derrota decidieron unirse eligiendo como candidato a D. Juan José Videla, pariente del renunciante [Clemente Videla], quien recién había llegado de Buenos Aires. Como consecuencia del fraude, el candidato situacionista, Vicente Moreno (de quien ignoro su parentesco con Manuel María Moreno), venció por 131 votos contra 60. Fué entonces, que el equilibrio de fuerzas en pugna no pudo perdurar

---

pacíficamente. Mallea relata a Roca que los autonomistas disidentes, no consiguiendo ser aceptados como partido por los nacionalistas, "...parece fuera de duda que vuelven los ojos al bochinche como único recurso que les queda", y los nacionalistas "...azuzan a los disidentes para que se lancen al barullo a fin de pezar si el río se revuelve" (Mallea a Roca, San Juan, 1-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34).

<sup>7709</sup> Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34.

<sup>7710</sup> sobrino y conuñado del Gobernador Rosauro Doncel; y marido de Dolores Morcillo, hija del Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo.

<sup>7711</sup> A juicio de Nataniel Morcillo, Mallea se hallaba, a pesar de su superior capacidad, en las mismas condiciones de Albarracín, pues "...los sanjuaninos no le perdonana [a Mallea] lo que para mí es el mayor de sus méritos; la humildad de su origen, lo que prueba que su posición actual se la debe a sí mismo" (Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, Córdoba, 2-V-1884, Archivo Roca, Leg.38). Y para un tal Luis, quién no puede ser otro que Luis del Carril, que le escribe a Roca en marzo de 1884, Mallea "...a quien mucho aprecié, no puede tampoco ser [sucesor de Agustín Gómez en la senaduría nacional], por las grandes resistencias que tiene por su oscuro linaje" (Luis ...a Julio A. Roca, Buenos Aires, 1-III-1884, Archivo Roca, Leg.37). Cabría agregar que pese a su mentado oscuro linaje, Mallea blanqueó esta capitis diminutio morganáticamente, al matrimoniarse con Justina Gil Merlo, la hija del Gobernador Anacleto Gil; hermana del Gobernador Anacleto Gil Merlo, y de la mujer del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín Toranzos (DN.1882-92). Fué padre de Vicente Mallea Gil, Ministro de Gobierno de Juan Maurín en 1935 (Videla, 1990, VI, 940).

<sup>7712</sup> Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7713</sup> Napoleón Burgoa a J. A. Roca, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33.

<sup>7714</sup> Napoleón Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33.

<sup>7715</sup> Carlos Doncel a Napoleón Burgoa, San Juan, 8-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33.

<sup>7716</sup> En efecto, por ser hijo de Juana Merlo Quevedo, el que fuera Gobernador, Anacleto Gil, entroncaba con la familia que reunía en su haber genético el mayor número de vinculaciones con las familias reinantes de la modernidad colonial-absolutista. Era sobrino de Zacarías Merlo Echegaray y pariente sanguíneo de los Albarracín, los Echegaray, los Toranzos y los Gómez Rufino (ver Cuadro SJ-X). La familia de los Toranzos y Montenegro era heredera de la antigua capellanía de Santa Bárbara (Verdaguer, 1931, I, 626).

<sup>7717</sup> nació en San Juan en 1859. Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel J. Godoy, Gobernador desde 1914 a 1917; y Senador Nacional desde 1920 a 1925.

<sup>7718</sup> Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, AGN, Sala X, Archivo Juárez Celman, Leg.12. En carta a Nataniel Morcillo, Burgoa retrataba sin remilgos sus sentimientos más caros, entre los cuales se daba una fuerte dosis de una premonitoria proclividad suicida, al recriminarle "...su teoría de que la lealtad impone el deber de seguir al amigo en sus errores hasta sucumbir con él. Creo al revés, que la amistad impone el deber de salvar al amigo del precipicio aún a costa de la vida, y esta es precisamente y en suma lo que yo me propongo esponiendo desde ya no sólo mi posición y porvenir, sino también mi existencia y con ella el porvenir de mis hijos, y a los mil peligros que una criatura sin padre quedan espuestas" (Napoleón Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Documentación Donada, Archivo Roca, Leg.33).

<sup>7719</sup> Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, Archivo Juárez Celman, Leg.12.

<sup>7720</sup> Bodei, 1995, 361. Al respecto cabe comparar la tesis de Bodei con la de Halperín Donghi (1979), acerca de la barbarización o ruralización de las elites. En Argentina, las elites se barbarizaron durante las guerras civiles, y a partir de la caída de Rosas habrían experimentado un creciente proceso de urbanización o hibridización.

<sup>7721</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32.

<sup>7722</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32.

---

<sup>7723</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32.

<sup>7724</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32.

<sup>7725</sup> Todos los testimonios coinciden que fue en el domicilio de Burgoa, el lugar donde se conferenció sobre las posibilidades de la conspiración. Según Albarracín, Burgoa declaró "...que había sustentado el propósito de la revolución y que Francisco Aguilar le había propuesto el asesinato del Gobernador que él reusó" (Juan Pedro Albarracín a Roca, San Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). A su vez Aguilar dice que Burgoa "...es el que le propuso semejante cosa y que él fue el que no aceptó" (Juan Pedro Albarracín a Roca, San Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Al parecer de Gómez, el orden de las declaraciones testimoniales fué inverso, pues Burgoa declaró que Aguilar "...proponía a su partido el asesinato del Gobernador Gil...después de haber hecho Aguilar otra igual denunciando a Burgoa" (Agustín Gómez a Roca, San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Como una premonición de los sucesos que se iban a precipitar, Burgoa le adelantaba a Roca en Noviembre de 1883, que "...quieren echar una mancha sobre mi nombre honrado para desprestigiarme ante Vd. y ante el exterior e inutilizarme judicialmente para el desempeño de puestos públicos en mi país" (Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34). El propio Gómez, en carta a Roca fechada casi un mes después, confirmaba las declaraciones de Burgoa, al afirmarle que él no creía que Burgoa "...sea capaz de entrar en planes tan siniestros" (Agustín Gómez a Roca, San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35).

<sup>7726</sup> En el diario *La Prensa* de Buenos Aires, del 10-II-1884, la crónica registra que el diario *El Zonda*, situacionista, es decir partidario del oficialismo provincial, acusaba como autores del crimen "...al Coronel Sebastián Elizondo, Napoleón Burgoa, José Carrizo (este último llamado perro de Manuel María Moreno), Eusebio Méndez, Ignacio Correa, un hermano de Saturnino Aráoz, y Antenor Balmaceda, agregando que la señal partió de la imprenta de La Unión. Los cadáveres de Elizondo, de su asistente Ismael Andrade y de Tristán Vega, han sido exhibidos en el cuartel". Elizondo fué compañero del "Chacho" Peñaloza y de Felipe Varela, en la resistencia a la Guerra de la Triple Alianza: "...era lindo tipo, como de cincuenta años: no sabía leer, blanco, facciones distinguidas". El 12-III-1884, la crónica registra que Benito Piñero, jóven perteneciente a una familia de Córdoba, acompañado de Antenor Balmaceda y tres peones más, fueron presos en Mendoza. Al día siguiente, se registra que el carruaje de Moreno, un dueño de barracas, "...presenta manchas de sangre y nadie lo ha reclamado a la policía, ha huído de San Juan en la noche del suceso, y sus peones y hombres de confianza figuran como actores en el drama". Nataniel Morcillo exculpaba a los Mitristas de toda responsabilidad en el crimen, aunque no le cabía duda que "...[Domingo] Morón [Cortínez] que es el tipo del gauchi-político ha sido sabedor y aún proveedor de armas por su sola cuenta (así aparece del proceso)" (N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Archivo Roca, Leg.37). En cambio, para Juan Pedro Albarracín, casi un año después de ocurrido el crimen, en un rapto de sospechosa xenofobia, señaló como principal instigador de los asesinatos de Febrero del 84, al Chileno Ramón Castañeda, "...despechado con Gómez porque le dijo por la prensa que siendo Juez había dado sentencia por dinero [cohecho], y con nosotros porque no deferíamos a sus pretensiones de que un Chileno fuese Diputado al Congreso Argentino, que ha de servir al que mejor le pague y quede contra nosotros, que toda su vida ha vivido a cogote, como vulgarmente se dice, de Manuel Moreno y de otros a quienes ha hecho pagar bien caro sus servicios. Bástele saber que en veinte años que tiene de residencia en esta y a pesar de haber medrado siempre al amparo del gobierno, no ha sabido adquirir un palmo de terreno en que vivan sus hijos y descansen sus huesos" (Juan Pedro Albarracín a Julio Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43).

<sup>7727</sup> Según Pedro A. Garro, Doncel "...es incapaz de captarse simpatías que es débil y tímido como el que mas y por último que el carácter hasta cierto punto díscolo de nuestros compatriotas no se deja llevar por hombres de semejante talla" (Pedro A. Garro a Juárez Celman, San Juan, 30-V-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.17).

<sup>7728</sup> Carlos Doncel a Julio A. Roca, San Juan, 20-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36. A juicio de Videla (1962-90), el Mitrista Domingo Morón, que luego fuera Gobernador y Senador Nacional, también estuvo comprometido en el atentado que costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Según El Demócrata, del 12 de Febrero, cuando Burgoa estuvo en Buenos Aires "...hace algunos meses, vino con el propósito de realizar un negocio que hubo de fracasar por la falta de fondos. Carecía de 500 pesos nacionales para completarlos, y en tales circunstancias ocurrió al Senador Gómez para que se los facilitara, quien lo hizo con la buena voluntad que todos le reconocían. El Senador Gómez ha sido su primera víctima, siendo el caso de esclamar; así paga el diablo a quien bien le sirve. Con los resultados de la operación realizada, adquirió aquí 100 rifles que son los que han servido para la revolución o motín que han acabado

---

con la vida de Gómez" (*El Demócrata*, Lunes 11 y Martes 12 de Febrero de 1884, año VIII, n.2566).

<sup>7729</sup> sobre Clemente Cuello, ver Oliver, 1892, 83-110; y sobre Antenor Balmaceda, ver Oliver, 1892, 108-110.

<sup>7730</sup> Bodei, 1995, 415.

<sup>7731</sup> ver Frías, 1964-65.

<sup>7732</sup> En la caricatura del chispeante Mosquito, aparece "...la sombra de Agustín Gómez horrorizando a Rafael Igarzábal, ha tocado la cuerda sensible del vivo Senador por San Juan, produciendo una acusación ante el Pastor Correccional" (*El Demócrata*, Lunes 7 y Martes 8 de Abril de 1884, n.2613).

<sup>7733</sup> Respecto al Senador Mitrista Rafael Igarzábal, al referirse a los sucesos de San Juan, "...pretende abarcar en una carta, las tres facetas distintas bajo las cuales puede seriamente estudiarse aquellos acontecimientos. El Señor Senador condena el asesinato eso es de cajón. El Senador declina todo contacto con los que hagan uso de esos medios sangrientos para conseguir el triunfo de un partido. Pero lo que nos llama la atención es que según resulta de la misma exposición de ese Senador, el asesinato de Gómez es un hecho que no debe extrañarnos, pues parece que en San Juan se vivía bajo la presión de la dictadura del finado Senador. Su muerte, aún cuando es una sensible pérdida, es un triunfo para las instituciones" (*El Demócrata*, Lunes 11 y Martes 12 de Febrero de 1884, n.2566). Y respecto al Vice-Gobernador Irigoyenista Juan Luis Sarmiento, El Demócrata, de Buenos Aires, señalaba un mes más tarde, que "...Un Vice-Gobernador que firma un manifiesto concebido en términos violentos, tratando de denigrar y hacer odioso y despreciable ante el público al Gobernador, acusándolo de gravísimas faltas: que se suscribe con dinero para empresas políticas de cuya moralidad puede juzgarse trayendo a la memoria el horrendo crimen del día 6: que se mancomuna en política, estableciendo vínculos estrechísimos con los indicados como autores de los citados crímenes: que ha encontrado posible y fácil el derrocamiento del Gobernador por medio del asesinato, haciendo tabla rasa con la Constitución y la moral; que abre con su conducta la puerta a la sedición sirviendo de eslabón entre los revolucionarios y el nuevo orden de cosas" (*El Demócrata*, Miércoles 19 de Marzo de 1884, n.2397).

<sup>7734</sup> Es de suponer que Burgoa no desconocía las imputaciones que en su momento se hicieron acerca del rol que había desempeñado su padre en el crimen de Francisco Narciso Laprida. El periódico *El Demócrata*, de Buenos Aires, retransmitió en 1884 una nota aparecida en El Norte de Buenos Aires, donde se remarcaba el posible origen de la conducta de Burgoa en sus antecedentes familiares, pues sostenía que "...Hay nombres de triste celebridad, cuyo solo recuerdo basta a conmover el espíritu menos predispuesto. Uno de estos es el de Burgoa. Burgoa padre [José Anacleto] tuvo su época, hizo su trámite sangriento, ocupó una página del pasado en que, al lado de la víctima, inmolada en aras de la libertad, se encontraba su verdugo. Burgoa hijo, acaba también de acentuar su personalidad histórica, en la crónica de nuestras luchas contemporáneas. Uno y otro han enlutado la patria, ligando con sus hechos dos épocas cuya similitud va apareciendo cada día más de relieve. Aquél, arrancando la vida a uno de los hombres más ilustres del pasado, al Dr. Francisco N. Laprida, Presidente del Congreso Constituyente de 1816, que declaró nuestra Independencia, y éste, asesinando de una manera igualmente cobarde, al Senador argentino Agustín Gómez" (*El Demócrata*, Domingo 24-II-1884, n.2577).

<sup>7735</sup> N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, Archivo Roca, Leg.36. Burgoa estaba seguro que en las conciencias de Albarracín y Mallea "...yo no tengo participación alguna en la muerte de Gómez y Gil y ni aunque sepan quien es el [verdadero] autor, harán porque yo lo sea, para perderme ante la opinión de la República" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36). En cuanto a los detalles del crimen, Burgoa se limitó a informarle a Palemón González, que

"...cuando oí los tiros de la revolución salté a caballo sin más avío que dos atados de cigarrillos y sin un solo medio en el bolsillo, y que cuando supe que habían hecho la barbaridad de matar a Gómez y Gil, me fui a Angaco, y de allí pasé a Caucete, y cuando pasaba a diez cuadras de la Villa oí en ella un tiroteo que supe después había sido con [Sebastián] Elizondo resultando este y los pocos que lo acompañaban ya, muertos" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36).

Aunque Burgoa poseía la conciencia tranquila, tenía la certeza que los hombres del poder "...me cargarían la romana y darían orden de que me mataran donde me hallaran" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36).

<sup>7736</sup> "...Eran las dos y media de la tarde cuando la Sra. dueña de la casa donde estaba se me presentó llorando y pidiéndome que me disparase porque ya venía una partida a tomarme y que traía orden de matarme, que así se lo aseguraba una persona que acababa de traerle el aviso y que la partida ya llegaba. No tuve más tiempo que saltar a caballo, atropellar un cerco de dos varas de alto que divide a un parral de un potrero, saltar otro que dá a la calle y tomar el campo. En una palabra he salvado a pata de caballo y milagrosamente" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36).

<sup>7737</sup> Sus cómplices también habrían optado por el exilio. Tal el caso de José Carrizo, cliente político de Manuel M. Moreno, quien se habría refugiado en el Valle de Traslasierra, Córdoba. Esta presunción obedece a que su homónimo, José I. Carrizo, que bien pudo ser su hijo, fue Senador Provincial por Ischilín entre 1925 y 1932.

<sup>7738</sup> según un artículo-comunicado, publicado por El Demócrata, el Juez Sánchez era "...partidista acérrimo y dócil instrumento del Diputado [Juan P.] Albarracín, con el objeto no de hacer justicia, sino realmente de hacer servir sus formas y exigencias para la venganza ruin y las persecuciones a muerte de los llamados allá disidentes, es decir, de los ciudadanos del 'Club del Pueblo' y del 'Liberal'" (*El Demócrata*, Miércoles 26 y Jueves 27 de Marzo de 1884, n.2605). Ignoro el parentesco entre el Dr. Numa Sánchez Benavidez y el Juez de Primera Instancia Dr. Segundo Benavidez.

<sup>7739</sup> Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen "...convertir en instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Dr. Numa Sánchez Benavidez adoptó "...el temperamento de mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento estricto de mi deber sin servir ni al gobierno ni a los revolucionarios sino a la justicia tal cual yo la entendí (Sánchez Benavidez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.15).

<sup>7740</sup> N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30-III-1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37.

<sup>7741</sup> *El Demócrata*, Domingo, 30-III-1884, n.2606.

<sup>7742</sup> Morcillo les aconsejó que "...como un honor a la memoria de Gómez la dejaran vacante este año, y tengo noticias que siguen mi consejo" (N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37). En cuanto al Ministro de Gobierno del Gobernador Carlos Doncel, también estaba sin decidirse entre Juan C. Albarracín, y Segundino Navarro. Transcurrido un año de la frustrada chirinada, Luis del Carril le advirtió a Roca que hay rumor en San Juan de un próximo alzamiento del cuartel, que

"...obedecerá a Facundo Maradona, que habrá una volteada de cuatro o seis cabezas autonomistas; que harán renunciar a Doncel, que como Mallea no está, la Legislatura nombrará al Lego [Moisés Cardozo] Gobernador como Presidente actual de la Cámara de Diputados y que entonces habrá la de Dios es Cristo!" (Luis del Carril? a J. Roca, Buenos Aires, 5-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43).

En efecto, Doncel temía de un momento a otro un golpe de mano, y para Septiembre de 1885, un testigo presencial vió

"...recorrer la ciudad por partidas de diez a quince hombres armados a remington y revólver, y en la estación de Ferrocarril, se me dice, que existe una guardia de 50 peones perfectamente armada lista para proteger a la policía" (E. Sicarenos a D. Rocha, Mendoza, 29-IX-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>7743</sup> hijo del Gobernador Arístides Villanueva Chenaut y de Vicenta Doncel.

<sup>7744</sup> Juan D. Videla a Juárez Celman, San Juan, 21-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

<sup>7745</sup> Luis del Carril era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavidez Balmaceda, avecindado en Tucumán, sobrino de la educacionista Rectora de la Escuela Normal de San Juan María Villarino de del Carril, marido de Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65). Políticamente se pasó en 1885 de las filas del Roquismo a las del Rochismo.

---

<sup>7746</sup> Juan P. Albarracín a Luis...[del Carril], San Juan, 10-XII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Saturnino Aráoz, cuando Rector del Colegio Nacional, en 1882, eliminó del cuerpo docente del Colegio a Juan Pablo Albarracín y Nataniel Morcillo por estar enrolados en la política de Agustín Gómez y Anacleto Gil. Con esta actitud, Aráoz se había granjeado el desprecio y la mofa del resto del claustro (ver Saguier, 1997). Aráoz tenía un hermano que participó del atentado criminal contra Agustín Gómez.

<sup>7747</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>7748</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>7749</sup> para el caso de Tucumán, ver Gallo, 1941; y para el de Mendoza, ver Lacoste, 1994.

<sup>7750</sup> murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de Bragado Aparicio Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll (*La Nación* y *La Prensa*, Martes 27-III-1894).

<sup>7751</sup> García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X). Dos años después, en 1898, la investigación del crimen de García fué dando sus frutos, pues se determinó que "...el que hizo el disparo que dió muerte al ex-Diputado Pedro García no es el tal Mariano Noriega, como maliciosamente se aseguró en un principio. Es Ángel Ruiz, sobrino del ex-Gobernador, que hasta la noche del 27 de Agosto permaneció preso por haber asesinado en la campaña a un apreciable vecino. Esa noche fue sacado de la celda y mandado en la comisión por orden del entonces Jefe de Policía José A. Silvetti. Angel Ruiz tiene fama de ser un gran tirador y hombre arriesgado. Antes de cometer su primer asesinato, hacía aquí una vida fastuosa, merced a la fortuna de una viuda con quien contrajo matrimonio. En una conversación mantenida con otro de los presos, Ruiz ha declarado que ninguno de sus compañeros llamó a la puerta de calle de la casa de García, sino que todos entraron por los fondos de la casa, capitaneados por los comisarios Justo Figueroa y Benjamín Alaniz Plaza y por los ex-presidarios Sargento Gómez y N. Noriega (*La Nación*, 2-X-1898). Sin embargo, al establecer la comparación con el caso del periodista sanjuanino José F. Echevarría, ultimado en San Juan en enero de 1902, el corresponsal de La Prensa llegaba a "...conclusiones pesimistas sobre el resultado de las gestiones judiciales. En Santiago del Estero se quiso eliminar a un ciudadano enérgico, con prestigio popular y capaz de ser valla poderosa contra el personalismo de un pequeño círculo que se había adueñado del gobierno y que pretendía perpetuarse con ridículas y menguadas combinaciones. Para eliminarlo, la policía no tuvo valor suficiente, a pesar de su reconocida temeridad, y echó mano a uno de los presos que tenía en la cárcel pública para consumir el hecho sangriento. La policía creyó que así salvaba su responsabilidad penal y también el pensamiento de la institución, en todo cuanto eran capaces de comprenderlo así funcionarios ignorantes y apasionados" (*La Prensa*, 9 de Enero de 1902, "Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos").

<sup>7752</sup> "La Situación política en San Juan", *El Diario*, 8-I-1902.

<sup>7753</sup> hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; y hermano del Diputado Nacional Mauricio Daract ("Esperando la Intervención", *El Diario*, 30-X-1896).

<sup>7754</sup> "La Situación política en San Juan", *El Diario*, 8-I-1902.

<sup>7755</sup> El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandoli hubo un cortejo de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (*La Prensa*, 7 y 9-XII-1897; y *El Diario*, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10).

<sup>7756</sup> Para *La Nación*, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (*La Nación*, 14-XI-1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard. Para *El Diario*, "...la comisión encargada del asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se alojaba, y se fue directamente a la habitación en que se había refugiado. Saurit era un hombre bravo. Vió sin duda clara su suerte y vendió la vida. Se armó una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, huyendo Carlos Pérez, que lo acompañaba, gravemente herido de un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", *El Diario*, 13-XI-1901). En el acto de inhumación hablaron los Señores Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y Francisco Capmani ("Los Asesinatos de

---

Santa Fé", *La Prensa*, 15-XI-1901). Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fue objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", *La Prensa*, 17-XI-1901; y exposición del Senador Nacional Carlos Pellegrini, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 12a. Sesión de Prórroga, 14-XI-1901, pp.455-459).

<sup>7757</sup> "Los asesinatos de Santa Fé", *La Prensa*, 14-XI-1901, p.5. Sobre 'La Cadena' de Córdoba, permítaseme citar a Saguier, 1993.

<sup>7758</sup> Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y en Saguier, 1997d.

<sup>7759</sup> se trata del ex-Diputado Nacional Felipe Carreras, perteneciente a la Liga del Sur, y su primo el Jefe Político del Departamento de General López, José Antonio Montes Carreras, militante Radical.

<sup>7760</sup> "Movimiento Político. Incidente sangriento en Melincué. Muerte de Silva Chávez", *La Prensa*, sábado 21-II-1914, p.12; "Movimiento Político. Pedido de la Liga del Sur. Sobre el Incidente de Chapuy. Versiones contradictorias", *La Prensa*, Domingo 22-II-1914, p.11; "Política Santafesina. El incidente sangriento de Chapuy", *El Diario*, 24-II-1914, p.4; y "El Suceso de Chapuy", *El Diario*, Jueves 26-II-1914, p.4. *El Mensajero*, órgano oficial del partido Radical en Rosario "...dió dos versiones. En una aparece agredido el Jefe Político José Antonio Montes, y en la otra se presenta la muerte de Silva Chávez como un asesinato. *La Reacción* y *La República*, diarios radicales, presentan el suceso como una consecuencia de un atentado contra el Jefe Político Sr. Montes. *La Capital*, de Rosario, lo dá como un alevoso asesinato" (*La Prensa*, Domingo 22-II-1914, p.11). Un extenso debate sobre este sangriento incidente se transcribe en las exposiciones de los Diputados Nacionales Lisandro de la Torre y Rogelio Araya (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.10, 20-V-1914, pp.407-415).

<sup>7761</sup> sobre el crimen de Jones, también ocurrido en la Rinconada, ver la versión de un militante Radical Bloquista en Bates (1922); y la de un Radical nacionalista o Yrigoyenista, en Damianovich (1922).

<sup>7762</sup> ver Lacoste, 1994, 109-110, y 123-126.

<sup>7763</sup> ver Lacoste, 1994, 216-217.

<sup>7764</sup> Herrera, 1930, 52; y *La Nación*, 3-IV-1892.

<sup>7765</sup> El Ejército en estos días (*El Municipio*-17-I-1892)

<sup>7766</sup> Sobre colonos, mensús y confinados, ver Viñas, 1982, 126-132.

<sup>7767</sup> Sobre la composición del cuerpo de oficiales del Regimiento 1º de Artillería, ver Mendía, 1890, I, 19, 83 y 265. Esta singular obra –que pude consultar merced a la generosidad del Prof. Joaquín Meabe y cuya reedición es difícil entender como no se ha producido aún– es en verdad una original compilación de medio centenar de testimonios escritos por los oficiales que acaudillaban los diferentes cantones, revolucionarios y contra-revolucionarios. En el primer volumen declaran Anacleto Espíndola, Enrique S. Pérez, Leandro Anaya, Torcuato Harbin, Pablo Rauch, Justo González Acha, Domingo A. Bravo, Emilio Miliavaca, Mariano de la Riestra, Fernando Cabrera, Aurelio Figueroa y Miguel E. Molina. En el segundo volumen declaran Eduardo O'Connor, Ricardo A. Day, José García, Desiderio Rosas y Racedo, Martín E. Aguirre, Zacarías Supisiche, S. Anaya, Donato Alvarez, Juan G. Díaz, Modesto Torres, Saturnino Lara, Honorio Iturre, Félix Adalid, Ramón Aberastain y Oro, Miguel E. Molina, Francisco Smith, Rodolfo Krakenstein, Jorge Reyes, Nicolás H. Palacios, Alejo Belaúnde, Nicolás Palavecino, Odilón Stubane, Manuel de la Serna, Juan M. Calaza, B. S. Cordero, Daniel de Solier, Miguel Malarín, Rodolfo Mon y José Ignacio Garmendia.

<sup>7768</sup> Nellar, 1972, II, 353. Sobre Napoleón Uriburu, ver Siegrist de Gentile, 1997; y Fernández Lalanne, 1998. Uriburu fue Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. Era hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casó en 1869 con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y fue suegro del Coronel Pablo Escalada Saavedra. En oportunidad de la Revolución del 90 tenía cuarenta años largos, y era hermano del que luego fue

---

Presidente de la República José Evaristo Uriburu (1895-98); primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (1895-99), del Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro, y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón; y tío segundo del Dictador José Félix Uriburu. Uriburu tenía en Salta en la década del 70 sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y "...sublevará más tarde los de Yrurá y Santa Victoria". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.; y AGE, Leg.13.204). Según refiere Cutolo en su Diccionario Histórico y también Siegrist de Gentile, Uriburu se ensañó con las tribus Tobas y en defensa de los numerosos obrajes madereros instalados en el Chaco, a los cuales proveía con mano de obra indígena en condiciones de servidumbre. Este hombre funesto, a juicio del Gobernador Autonomista de Salta Francisco J. Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición administrativa ni se puede cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y persigue, y destierra a los que son amigos del gobierno". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.). Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel Napoleón Uriburu en Salta obedeció a un plan gestado por el Presidente Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha (Torino y Figueroa de Freytas, 1982, 279).

<sup>7769</sup> Lamentablemente, las Resoluciones del Ministro de Guerra Nicolás Levalle, por las cuales este Regimiento fue trasladado en sendas oportunidades, no han podido ser corroboradas, por cuanto el Boletín del Estado Mayor General del Ejército correspondiente al año 1891 desapareció del volumen que lo contenía, existente en la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército. Este acto de vandalismo intelectual ocurrió hace ya tiempo, pues quien lo sustrajo dejó entre las páginas sobrevivientes una vieja cicatriz. Probablemente, la substracción haya obedecido a que cuatro años después del trágico acontecimiento aquí relatado asumía la Presidencia de la República el hermano del General Napoleón Uriburu, o más recientemente haya obedecido a que los turiferarios de turno, que nunca faltan, hayan querido quedar bien con el Presidente Juan Domingo Perón, sobrino carnal de uno de los vocales del Consejo de Guerra integrado en Formosa, y cuyo muy escueto legajo personal de apenas tres fojas sugiere que se trataba de un deudor contumaz (AGE, Leg.10.012).

<sup>7770</sup> Archivo General del Ejército (AGE), Leg.8636. El diario **La Nación** informa el 11 de agosto de 1891 que la tropa habrá de nutrirse de "...los reclutas del depósito de Río Cuarto, cuya institución se trata de suprimir" (**La Nación**, 11-VIII-1891).

<sup>7771</sup> Reglamento Táctico de Maniobras de Artillería de Campaña (AGE, Leg.3684).

<sup>7772</sup> Oficina administrativa de una unidad de tropa donde se prepara, formula y archiva toda la documentación referente a la administración de la unidad.

<sup>7773</sup> La guardia de prevención la compone el servicio nombrado diariamente por el Jefe del Cuerpo y tiene por objeto la vigilancia del Cuartel y hacer cumplir los castigos que se imponen a la tropa y custodiar las salas de disciplina y de prisión si los hubieran, se considera cumplido el servicio de prevención cuando este ha sido relevado por otro, que generalmente cuando no ocurre caso extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas (reproducido íntegro en el Apéndice H-V).

<sup>7774</sup> El Coronel Ruiz Moreno era hijo de un emigrado unitario Manuel Ruiz Moreno, nacido en San Pedro, y de Dolores del Pardo, y era hermano

---

del Coronel Octavio Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1985, 62).

- <sup>7775</sup> AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No.3, 21-III-1878, folio 197. Nacido en Santa Fé en 1855, pertenecía a la 5ª Promoción del Colegio Militar, que había egresado en 1878, y contaba en 1891 con 36 años de edad (Figuerola, 2001, 109). Fueron sus camaradas de Promoción el duelista de triste memoria Coronel Carlos Domingo Sarmiento y el escritor Agustín Álvarez (a) Fray Mocho.
- <sup>7776</sup> Coronel Simón Santa Cruz al Comandante Joaquín Viejobueno, Palermo, 22-X-1886 (Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 441).
- <sup>7777</sup> hijo de Antonio López y Dorotea Zamora, vecinos de Santa Fé (AGE, Leg.6984).
- <sup>7778</sup> La chirinada era en el lenguaje popular un cuartelazo o movimiento insurreccional abortado, que proviene del Sargento Chirino, personaje representado en la obra teatral Juan Moreira, quien persigue al bandolero o gaucho matrero.
- <sup>7779</sup> AGE, Leg.23, fs,3v..Declaración del 2º Jefe del Regimiento Tte. Cnel. Federico López. Cabe aclarar que este particular y valioso sumario fue posible consultarlo porque a diferencia de la mayoría de los mismos, no fue desglosado del legajo personal del Cap. Abogado. La reglamentación establece que los legajos personales son eternos, pero los sumarios y procesos al cumplir medio siglo son descartados sin microfilmarse, aduciendo en descargo de esta política documental la falta de espacio.
- <sup>7780</sup> Mendiá, 1890, II, 148.
- <sup>7781</sup> Era hermano mayor de Enrique Abogado, quien alcanzó el grado de General, pero que extrañamente firmaba su apellido Abogado con la v.
- <sup>7782</sup> En Septiembre de 1895 el General Francisco Reynolds le extiende los pasajes para que baje a la Capital a curarse de su enfermedad (AGE, Leg.23). Con posterioridad desposó con Amelia Rebollo, pero no tuvieron descendencia.
- <sup>7783</sup> AGE, Leg.8636. Tres años antes, en 1894, el Coronel Alejandro Azopardo dijo de él que "...si este oficial entraba de servicio cometía falta para que se le arrestase, si era nombrado en él daba parte de enfermo, si salía con licencia seguía la falta; así que como digo el corto tiempo que presta sus servicios, ha tenido más prisiones y partes de enfermo que servicio que ha prestado".<sup>7783</sup> (AGE, Leg.8636)
- <sup>7784</sup> Declaraciones testimoniales hechas ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, el 7 de Octubre declara el Tte. Cnel. Federico López, el 16 de octubre de 1891 los oficiales del regimiento: Abogado, Tassi, Paz y Redruello, y el 20 de Octubre el Gral. de Brigada Napoleón Uriburu. Sorprendentemente, los Alféreces Demetrio Márquez y José M. Muñoz no fueron convocados a declarar por el Fiscal Carpi.
- <sup>7785</sup> AGE, Leg.23, fs.4.
- <sup>7786</sup> AGE, Leg.23, fs.4.
- <sup>7787</sup> AGE, Leg.23, fs.4.
- <sup>7788</sup> AGE, Leg.23, fs.4v.

- 
- <sup>7789</sup> AGE, Leg.23, fs.4v.
- <sup>7790</sup> AGE, Leg.23, fs.4v y 5.
- <sup>7791</sup> Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en el Apéndice B-XXV.-
- <sup>7792</sup> Bloch, 2003, 110.
- <sup>7793</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>7794</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>7795</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>7796</sup> AGE, Leg.23, fs.5. Los deberes que tienen los Comandantes de destacamentos hacia los Jefes de Cuerpo son: "...darle cuenta semanalmente de las novedades ocurridas durante este tiempo, la instrucción dada a la tropa, el rancho suministrado, procurando siempre ajustarse al régimen y racionamiento del Cuerpo, y si ha sido necesario alguna alteración, también darle cuenta dando las razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta inmediatamente de los urgentes. El deber que tiene un Comandante de destacamento para con un superior militar bajo cuyas órdenes está el destacamento, es darle cuenta diariamente de las novedades ocurridas y de las disposiciones que haya tomado en bien del servicio y de las necesidades del destacamento" (reproducido íntegro en el Apéndice H-V).
- <sup>7797</sup> AGE, Leg.23, fs.5.; y Apéndice H-V.
- <sup>7798</sup> Nellar, 1972, II, capítulo LVIII.
- <sup>7799</sup> Breve Introducción a la Historia del Derecho Penal Militar Argentino, en Igounet (h) e Igounet, Código de Justicia Militar (Librería del Jurista), pp.XXVII-XXIX. Sobre las Ordenanzas Reales de Carlos III, ver Millán Garrido, 1993. Sobre dichas Ordenanzas en Argentina, ver Ramírez, 1987, 253.
- <sup>7800</sup> Groussac, 1972, 143.
- <sup>7801</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.
- <sup>7802</sup> Los cuatro últimos mencionados: Tassi, Redruello, Márquez y Perón pertenecieron a la Promoción 16<sup>a</sup>. del Colegio Militar, la misma a la cual perteneció el entonces cadete Juan J. Comas, involucrado en 1906 en un crimen pasional, donde mató al Capitán Arturo Macedo e intentó luego suicidarse. La foja de servicio de Alberto Perón consta sólo de tres fojas que impiden conocer el motivo de su muerte. Márquez tuvo un transcurso fugaz por el Colegio Militar como Aspirante agregado del Regimiento 1° de Artillería, pero fue dado de baja de su cuerpo donde revistaba y era ajustado.
- <sup>7803</sup> En la Promoción 16<sup>a</sup>, Tassi alcanzó en el Orden de Mérito el 37° lugar entre 56 egresados, Márquez el 43°, Perón el 46°, y Redruello el 52° (Figuerola, 2001, 115, 136, 142 y 161). En dicha Promoción se alcanzaron a graduar 26 artilleros, de los cuales solo media docena alcanzó el grado de general (Ledesma, Solá, Lagos, Abogadro, Badaro y Maglione). Alberto Perón era hijo del médico Tomás Perón y tío de Juan Domingo Perón (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). Entre otros notorios oficiales, que pertenecieron a la misma Promoción en que se graduaron el Mayor Comas y los Tenientes Tassi, Márquez, Redruello y Perón estuvieron Froylán Leyría, Enrique

---

Abogado (hermano menor de José M. Abogado, quien para diferenciarse de su hermano se había alterado el apellido incluyendo una v corta), los Revolucionarios de 1905 Isidro Arroyo, Ricardo Pereyra Rozas y el Mayor Emilio de Ipola, y los hermanos Spika, ya sea Augusto que llegó a Coronel, como Carlos que llegó a Mayor.

<sup>7804</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7805</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7806</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7807</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7808</sup> AGE, Leg.23, fs.11. El Sargento Quiroga era egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos.

<sup>7809</sup> Sobre la bailanta como forma de explotación en el Chaco, ver Bitlloch y Sormani, 1997.

<sup>7810</sup> El Cap. Abogado era para entonces soltero. Asimismo, Abogado padecía de sífilis, y para su larga y costosa terapia con sales de mercurio debía viajar periódicamente a Buenos Aires.

<sup>7811</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7812</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7813</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>7814</sup> AGE, Leg.23, fs.5v., 8, 10 y 23v..

<sup>7815</sup> AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14.

<sup>7816</sup> AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14.

<sup>7817</sup> AGE, Leg.23, fs.20v..

<sup>7818</sup> AGE, Leg.23, fs.6 y 15v.

<sup>7819</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..

<sup>7820</sup> Bloch, 2003, 104.

<sup>7821</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.

<sup>7822</sup> De seguro esta no fue la primera vez que Uriburu aplicaba la última pena, pues esta era usual en la IV División que comandó durante la Campaña del Desierto, y en la Jefatura de la Frontera de Salta.

<sup>7823</sup> AGE, Leg.23, fs.6.

<sup>7824</sup> AGE, Leg.23, fs.6.

<sup>7825</sup> AGE, Leg.23, fs. 9.

<sup>7826</sup> Probablemente el diario *Los Pueblos de Misiones*, publicado por el aguerrido político liberal y luego radical Coronel Angel Blanco, entre 1890 y 1892, traiga alguna referencia.

---

<sup>7827</sup> Cuadra aún consultar los diarios de Asunción, que por estar río de por medio, muy bien podrían haber reflejado dicha noticia.

<sup>7828</sup> Debo esta reflexión al Teniente de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

<sup>7829</sup> Sesión n.61 de la Cámara de Senadores de la Nación.

<sup>7830</sup> ver Herrera, 1930, 55.

<sup>7831</sup> ver Mendía, 1892, 137 y 147.

<sup>7832</sup> Prado, 1934, capítulos XIII y XIV; Daza, 1975, 49-52; y Fotheringham, 1998, 195. Miranda (1955) describe un Consejo de Guerra verbal incoado al cacique Yaloschi, en el Chaco (Miranda, 1955, 105; y Viñas, 1982, 321). Excepcionalmente, y sólo por ser cacique, por haber caído prisionero y para vengarse por haber atentado contra el Comandante Fontana, se le formó Consejo de Guerra. Según el General Gelly y Obes en la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, el Comandante Olascoaga fue relevado de la frontera "...para someterlo a un Consejo de Guerra por el fusilamiento inautorizado de un individuo y cometió el crimen de sublevarse con la fuerza que mandaba" (MMGyM, 1865, XVI). Según *La Vanguardia*, "...las damas [de alta sociedad] son hermanas de las que no tuvieron una palabra de piedad para el soldado Frías, que sufrió el suplicio de la "capilla" y fue ultimado por las descargas del piquete de fusilamiento, sin que nadie intentara tocar en su favor el corazón del presidente" (*La Vanguardia*, miércoles 4-XI-1908, reproducido íntegro en el Apéndice J-III). En 1869, el coronel Julio Campos escribe a Francisco Borges desde Pillahuinco "...Ayer, momentos antes de la Lista de la tarde, me fue denunciada por un trompa de caballería de línea una sublevación que debía tener lugar al toque de silencio, en la cual estaban implicados todos los extranjeros. Inmediatamente procedí a la averiguación, los puse en Consejo de Guerra verbal, y hoy a las 7 de la mañana de seis condenados a muerte se fusilaron dos, un cabo y un soldado, los dos prusianos" (Rodríguez, 1964, 27). En 1877 se substanció un Tribunal de Honor contra los Alféreces Edmundo Dale y Américo Álvarez, por haberse extralimitado en la defensa de los soldados Eulogio Esquivel, Antonio Gaitán y Juan Ríos, del Regimiento 2 de Caballería de Línea, procesados y condenados a muerte por desertión por ante un Consejo de Guerra Ordinario, con graves cargos contra la administración del Ejército y la División a cargo del General Marcelino Freyre (AGE, Leg.527, fs.1). Este sumario ha desaparecido tanto del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como del Archivo General del Ejército. El Coronel Francisco Borges, abuelo paterno de Jorge Luis Borges, firma en Noviembre de 1873, desde un Campamento en marcha, que "...el General en Jefe ha dispuesto que los soldados Francisco González y Pedro Barreto Núñez, pertenecientes a la Brigada Villaguay del Ejército Nacional, sean pasados por las armas, a las dos de la tarde de este día", por haber cometido crímenes, violencias y robos en el pueblo de San José de Feliciano (aprehendidos por los vecinos extranjeros César Franqui, Conrado Combis, Francisco Cámaras, Gabriel Garcés, Mariano Elóizaga, y Enrique Sampay, abuelo este último del constitucionalista peronista argentino homónimo), "...poniéndose en conocimiento del Ejército que todo crimen de esta naturaleza será castigado con igual pena, sin más trámite que la justificación del hecho" (AGE, Leg.50, fs.52-53, expediente suelto hallado en una Foja de servicio correspondiente a un oficial de dicha Brigada del Ejército Oriental que luego participó en el Ejército Argentino). El expediente correspondiente a este Tribunal de Honor no lo he podido hallar aún. Los fusilamientos ordenados en 1893 por el general Bosch en La Plata merecen la completa sanción del gabinete y al causante de los atropellos se le recompensa con la jefatura de las fuerzas de la Capital Federal. (P. R., 1913, 225-230; *El Municipio*, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1, reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-III; e Intervención de Buenos Aires, *La Prensa*, 16-VIII-1893, p.3, col.6-7 ).

<sup>7833</sup> El fusilamiento del Capitán Eloy Brignardello en julio de 1890 no puede haberse efectuado, a juicio de *El Municipio* (Rosario), "...de ninguna manera, porque de un acto tal quedan algunos antecedentes y también por lo que presenta una sola herida y está situada en la parte ya dicha y no en el pecho o al menos en el cuerpo. Entonces es aceptable, que el heroico joven, antes de traicionar su compromiso con los revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, resolvió faltar a los deberes de militar, y antes de recibir el castigo con que le amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su existencia". (El entierro del capitán Brignardello (*El Municipio*, martes 5 de agosto de 1890, p.1, col.7), reproducido en forma íntegra en el Apéndice J-IV).

7835 Sobre el terror y sus secuelas, ver  
<http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter.html>

7836 Abogado pertenecía a la Promoción 12<sup>a</sup>, la misma de Elías Paz, y había alcanzado en el Orden de Mérito el 46° lugar (Figueroa, 2001, 39). En su Promoción se habían graduado una quincena de artilleros, destacándose entre ellos los Generales Andrés Rodríguez, Eduardo Raybaud y Francisco Zerda, y el revolucionario Coronel Publio Risso Patrón.

7837 Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 2005.

7838 ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio Moyano Gacitúa, el Comandante de un Distrito Militar "...no puede suspender el auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo .....do de la misma dice: "Hay una clara distinción entre la suspensión del writ of habeas corpus en el sentido de la Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la suspensión ipso facto que ocurre en todas partes donde rije la ley Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la guerra, i existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las necesidades de la guerra. Su aplicación solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del empleado son lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades civiles i a casos surgiendo dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la Ley Marcial. Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de toda forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de traba a este poder discrecional a que aspira", i que se refleja en la actitud del oficial en cuestión; no obstante ello, la persona de los miembros del ejército i aun cuando están desempeñando funciones de sus superiores, no están fuera del alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que no sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por delitos comunes; siendo también simples particulares respecto a la jurisdicción disciplinaria de los jueces cuando no estén amparados sus actos por la ordenanza militar i observan el respeto debido a las autoridades". (Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Corrección Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, reproducido en Apéndice J-II). Moyano Gacitúa era el autor de un escrito titulado "La pena de penitenciaría y el proyecto de Código Penal", publicado en 1895; y del "Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino", publicado en 1899.

7839 AGE, Leg.23, fs.1.

7840 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v.

7841 AGE, Leg.23, fs.6v.

7842 AGE, Leg.23, fs.6v.. El Coronel Tassi fue el padre de la célebre atleta Olga Tassi y del General de Brigada Raúl Tassi.

7843 AGE, Leg.23, fs.7.

7844 AGE, Leg.23, fs.7.

7845 AGE, Leg.23, fs. 9.

7846 AGE, Leg.23, fs. 9.

- 
- <sup>7847</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.
- <sup>7848</sup> Los sucesos de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, en 1891, reproducidos enteros en los Apéndices D-III al D-VIII.
- <sup>7849</sup> ver Nunn, 1975; y Quiroga y Maldonado, 1988. Sobre el modelo prusiano, ver Rosas Berardi, 1998. Sobre el modelo napoleónico, ver Woloch, 1986.
- <sup>7850</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.
- <sup>7851</sup> AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v.
- <sup>7852</sup> AGE, Leg.23, fs.6v..
- <sup>7853</sup> AGE, Leg.23, fs.6v..
- <sup>7854</sup> Era hijo del Coronel Elías Paz López y de Clara Rodríguez, y sobrino político de Luciano y Pastor Gorostiaga. Su padre era primo hermano del ex Presidente Julio A. Roca. Llama la atención que en el legajo del padre, su madre Clara Rodríguez hace una declaración donde no lo menciona en absoluto. Elías Paz perteneció a la Promoción 12ª del Colegio Militar, la misma en la cual estaba el entonces cadete Manuel Maciel, involucrado en un sumario por conato de sodomía. Sobre la conducta de Elías Paz durante su paso por el Colegio Militar, ver Apéndices A-IV y J-I.
- <sup>7855</sup> AGE, Leg.23, fs.15v..
- <sup>7856</sup> AGE, Leg.23, fs.15v..
- <sup>7857</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..
- <sup>7858</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..
- <sup>7859</sup> AGE, Leg.23, fs.21v.
- <sup>7860</sup> AGE, Leg.23, fs.24.
- <sup>7861</sup> AGE, Leg.23, fs. 12v.
- <sup>7862</sup> AGE, Leg.4536.
- <sup>7863</sup> AGE, Leg.23, fs.10, 10v., y 11v.
- <sup>7864</sup> AGE, Leg.23, fs.11v.
- <sup>7865</sup> AGE, Leg.23, fs.19v..
- <sup>7866</sup> Los sucesos de Corrientes, **Sud América**, miércoles 22-VII-1891, reproducido entero en el Apéndice D-XI.
- <sup>7867</sup> AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu
- <sup>7868</sup> AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu
- <sup>7869</sup> AGE, Leg.4536.

---

<sup>7870</sup> García Enciso, 1970, 237.

<sup>7871</sup> AGE, Leg.3939. Saturnino E. García, como jefe de la 7a. División de Ejército, con sede en Salta, había participado en la represión de la Revolución de 1905 (Etchepareborda, 1968, 281).

<sup>7872</sup> AGE, Leg.1683, fs.93.

<sup>7873</sup> Para conocer su actuación represiva en el mundo de los pueblos originarios, ver Apéndice B-XIII.

<sup>7874</sup> Figueroa, 2001, 133.

<sup>7875</sup> AGE, Leg.8636.

<sup>7876</sup> Figueroa, 2001, 142.

<sup>7877</sup> Figueroa, 2001, 136.

<sup>7878</sup> El legajo 10.012, correspondiente al Alférez Alberto Perón fue extrañamente expurgado, pues solo consta de tres escasos folios, en los cuáles sólo se deja ver su condición de deudor contumaz. Cutolo lo da fallecido diez años después, en 1906 (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14).

<sup>7879</sup> AGE, Leg.10.012.

<sup>7880</sup> Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y permítaseme citar a Saguier, 1997.

<sup>7881</sup> Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (*La Nación*, 14-XI-1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard (pilar político del Gobernador Bernardo Iturraspe). Para El Diario, "...la comisión encargada del asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se alojaba, y se fue directamente a la habitación en que se había refugiado. Saurit era un hombre bravo. Vió sin duda clara su suerte y vendió la vida. Se armó una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, huyendo Carlos Pérez, que lo acompañaba, gravemente herido de un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", *El Diario*, 13-XI-1901). En el acto de inhumación hablaron los Señores Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y Francisco Capmani ("Los Asesinatos de Santa Fé", *La Prensa*, 15-XI-1901). Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fuera objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", *La Prensa*, 17-XI-1901).

<sup>7882</sup> hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10).

<sup>7883</sup> El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandoli hubo un cortejo de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (*La Prensa*, 7 y 9-XII-1897; y *El Diario*, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10).

<sup>7884</sup> era hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; y hermano del Diputado Nacional Mauricio Daract.

<sup>7885</sup> "Esperando la Intervención", *El Diario*, 30-X-1896.

<sup>7886</sup> García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X).

---

<sup>7887</sup> murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de Bragado Aparicio Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll (La Nación y La Prensa, Martes 27-III-1894).

<sup>7888</sup> "La Situación política en San Juan", *El Diario*, 8-I-1902.

<sup>7889</sup> redactor de El Verdadero Amigo del País y de El Fénix. Memoria sobre los acontecimientos notables en la Provincia de Mendoza en 1829, 1830 (Mendoza: Imp. Lancasteriana); citado en Zinny, 1868, 236; quien a su vez es citado en Galván Moreno, 1944, 386; y en Cignoli, 1980.

<sup>7890</sup> ver Facchinetti de Alvarez (1969/71). Para más detalles sobre el crimen político en Argentina, permítaseme citar a Saguier, 1997.

<sup>7891</sup> Fue el cabecilla del partido liberal Mitrista Sanjuanino, debe haber estado en la batalla de Santa Rosa bajo las órdenes del Gral. Arredondo, hecho acontecido en 1874, y estuvo comprometido en el atentado que costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Era nacido en 1843, hijo de Domingo Ignacio Morón y Navarro y de Paula Cortínez y Oro; cuñado del ex-Gobernador Santiago Lloveras (GI, 1864/57), y yerno del ex-Gobernador Zacarías A. Yanzi Orozco (GP.1852).

<sup>7892</sup> "San Juan bajo el terror. Del Fraude a la Violencia", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7893</sup> permítaseme citar a Saguier, 1997.

<sup>7894</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7895</sup> este gobernante fue acusado por la oposición del partido Constitucional de nepótico, por ser supuestamente pariente de su directo predecesor el Gral. Enrique Godoy. Sin embargo, para Videla (1990), ambos Godoy fueron solamente homónimos, "...con el mismo apellido como las cuatro o cinco distintas ramas de familias sanjuaninas de raíz colonial (Sarmiento, Quiroga, Videla, Sánchez, Castro) y como los que ahora se dicen descendientes o sobrinos de Domingo Faustino Sarmiento" (Videla, 1990, VI, 650). La caída de Godoy, derivó en tragedia personal pues su único hijo, Manuel José Godoy (h), se suicidó a propósito de un romance contrariado (Videla, 1990, VI, 678).

<sup>7896</sup> sobre la revolución del Cnel. Sarmiento, ver Videla, 1990, VI, 666-672. Sarmiento era el mismo militar que mata en duelo al escritor e historiador Lucio V. López.

<sup>7897</sup> ver la crónica de los hechos bajo el título "Los Sucesos de San Juan", en *La Prensa*, desde el 8 de Febrero hasta el 4 de Marzo de 1907.

<sup>7898</sup> la antesala del Partido Popular fue la Logia Carácter, responsable de reclutar los elementos que promovieron la sedición de 1907.

<sup>7899</sup> Videla, 1990, VI, Capítulos XIII y XIV.

<sup>7900</sup> "...Contador General: Roberto Sarmiento, tío del Gobernador; Presidente del Crédito Público: Juan Luis Sarmiento, tío del Gobernador; Presidente de la Caja de Jubilaciones: Dr. Cirilo Sarmiento, primo del Gobernador; Tesorero de la Provincia: Domingo Balaguer, primo del Gobernador; Jefe Político del Departamento Pocito: Julio C. Sarmiento, primo del Gobernador; Intendente Municipal de Angaco Norte: Adam Sarmiento, primo del Gobernador; Comisario Inspector de Policía: Aristóbulo Sarmiento, primo del Gobernador; Comisario de la Segunda Sección Policial: Osvaldo Sarmiento,

---

primo del Gobernador. [Firma] Pocito II" ("La reacción en San Juan", *El Diario*, 3-III-1909).

<sup>7901</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7902</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7903</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7904</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", *El Diario*, 9-I-1902.

<sup>7905</sup> La Prensa (Buenos Aires), 30-I-1902.

<sup>7906</sup> "Crímenes Oficiales. La Imposición del Gobernador Godoy. Asalto a hogares respetados. El asesinato del periodista Echevarría. A tiros y a sablazos. Inhumanidad de la policía", *La Prensa*, 8-I-1902, p.5.

<sup>7907</sup> Idem.

<sup>7908</sup> Idem.

<sup>7909</sup> Idem.

<sup>7910</sup> "Crímenes Oficiales. La Imposición del Gobernador Godoy. Asalto a hogares respetados. El asesinato del periodista Echevarría. A tiros y a sablazos. Inhumanidad de la policía", *La Prensa*, 8-I-1902, p.5.

<sup>7911</sup> *La Prensa*, 22-I-1902, p.5.

<sup>7912</sup> "Crímenes Oficiales. La Imposición del Gobernador Godoy. Asalto a hogares respetados. El asesinato del periodista Echevarría. A tiros y a sablazos. Inhumanidad de la policía", *La Prensa*, 8-I-1902, p.5.

<sup>7913</sup> Idem.

<sup>7914</sup> Idem.

<sup>7915</sup> Idem.

<sup>7916</sup> Idem.

<sup>7917</sup> Idem.

<sup>7918</sup> Idem.

<sup>7919</sup> Idem.

<sup>7920</sup> Idem.

<sup>7921</sup> Idem.

<sup>7922</sup> Idem.

<sup>7923</sup> Idem.

---

<sup>7924</sup> más luego fundador de *La Razón*.

<sup>7925</sup> El Tiempo, 29-I-1902.

<sup>7926</sup> "La Situación de San Juan. Un Periodista Asesinado. El Régimen de Terror", *La Nación*, 8-I-1902.

<sup>7927</sup> Idem.

<sup>7928</sup> "La Mazhorca de San Juan. El periodista Echevarría. Gérmenes revolucionarios" *El Tiempo* (Buenos Aires), miércoles 8-I-1902.

<sup>7929</sup> Idem.

<sup>7930</sup> Idem.

<sup>7931</sup> Idem.

<sup>7932</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", El Diario (Buenos Aires), 9-I-1902.

<sup>7933</sup> Idem.

<sup>7934</sup> Idem.

<sup>7935</sup> Idem.

<sup>7936</sup> Idem; y "La Elección-Una Parodia", *La Nación*, 27-I-1902, p.4.

<sup>7937</sup> "San Juan bajo el Terror. Del Fraude a la Violencia. El Proceso de la Imposición", El Diario (Buenos Aires), 9-I-1902.

<sup>7938</sup> "Los Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos", *La Prensa*, 9-I-1902.

<sup>7939</sup> Idem.

<sup>7940</sup> Idem.

<sup>7941</sup> Idem.

<sup>7942</sup> Idem.

<sup>7943</sup> "Crímenes Oficiales", *La Prensa*, 11-I-1902.

<sup>7944</sup> Idem.

<sup>7945</sup> Idem.

<sup>7946</sup> Idem.

<sup>7947</sup> "Política Sanjuanina. La Delegación del Partido Constitucional", *La Nación*, martes 14-I-1902.

<sup>7948</sup> Idem.

<sup>7949</sup> "Los Crímenes de San Juan", *El Tiempo*, Sábado 18-I-1902.

<sup>7950</sup> Idem.

<sup>7951</sup> Idem.

---

<sup>7952</sup> *La Prensa*, 21-I-1902, p.5.

<sup>7953</sup> Idem.

<sup>7954</sup> Idem.

<sup>7955</sup> *La Prensa*, 24-I-1902.

<sup>7956</sup> *La Prensa*, 25-I-1902.

<sup>7957</sup> *La Prensa*, 28-I-1902.

<sup>7958</sup> Idem.

<sup>7959</sup> Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, VI, 601.

<sup>7960</sup> este gobernante fue acusado por la oposición del partido Constitucional de nepótico, por ser supuestamente pariente de su directo predecesor el Gral. Enrique Godoy. Sin embargo, para Videla (1990), ambos Godoy fueron solamente homónimos, "...con el mismo apellido como las cuatro o cinco distintas ramas de familias sanjuaninas de raíz colonial (Sarmiento, Quiroga, Videla, Sánchez, Castro) y como los que ahora se dicen descendientes o sobrinos de Domingo Faustino Sarmiento" (Videla, 1990, VI, 650). La caída de Godoy, derivó en tragedia personal pues su único hijo, Manuel José Godoy (h), se suicidó a propósito de un romance contrariado (Videla, 1990, VI, 678).

<sup>7961</sup> el Gral. Enrique Godoy fue posteriormente Ministro de Guerra en el gabinete del Dr. Manuel Quintana, y como tal el que reprimió la Revolución Radical del 4 de Febrero de 1905.

<sup>7962</sup> sobre la revolución del Cnel. Sarmiento, ver Videla, 1990, VI, 666-672. Sarmiento era el mismo militar que mata en duelo al escritor e historiador Lucio V. López.

<sup>7963</sup> ver la crónica de los hechos bajo el título "Los Sucesos de San Juan", en *La Prensa*, desde el 8 de Febrero hasta el 4 de Marzo de 1907.

<sup>7964</sup> la antesala del Partido Popular fue la Logia Carácter, responsable de reclutar los elementos que promovieron la sedición de 1907.

<sup>7965</sup> Videla, 1990, VI, Capítulos XIII y XIV.

<sup>7966</sup> bajo el título "La Mazorca en San Juan", *El Diario de Buenos Aires*, refiere que "...la justicia de San Juan acaba de declarar que el Gobernador [Carlos] Sarmiento tiene facultades para encarcelar a los periodistas que no respeten su investidura. El procedimiento que acepta aquella maravillosa justicia es de lo más expeditivo; se suprime hasta la parodia del juicio por jurados y todo otro rodaje que estorbe o demore los úkases del gobernador. Queda con esto oficialmente suspendida en la provincia de San Juan una de las más fundamentales garantías que establece la Constitución Nacional: la libertad de prensa" (*El Diario*, 11-III-1910).

<sup>7967</sup> "...Contador General: Roberto Sarmiento, tío del Gobernador; Presidente del Crédito Público: Juan Luis Sarmiento, tío del Gobernador; Presidente de la Caja de Jubilaciones: Dr. Cirilo Sarmiento, primo del Gobernador; Tesorero de la Provincia: Domingo Balaguer, primo del Gobernador; Jefe Político del Departamento Pocito: Julio C. Sarmiento, primo del Gobernador; Intendente Municipal de Angaco Norte: Adam Sarmiento, primo del Gobernador; Comisario Inspector de Policía: Aristóbulo Sarmiento, primo del Gobernador; Comisario de la Segunda Sección Policial: Osvaldo Sarmiento, primo del Gobernador. [Firma] Pocito II" ("La reacción en San Juan", *El Diario*, 3-III-1909).

<sup>7968</sup> "...El Gobernador [Carlos] Sarmiento usa y abusa de una ley de imprenta que constituye una vergüenza para la cultura de la república y que es abiertamente contraria a los principios de nuestra carta fundamental. Por esa ley el gobierno tiene a su cargo la formación del jurado que debe entender en los delitos de imprenta. Luego califica el delito y por último ejecuta la pena. Ya el jurado para juzgar lo que se llama 'delitos de

---

imprensa' es casi un contrasentido ante el moderno concepto de la penalidad. Los delitos que cometen los periodistas son delitos comunes, calumnias, injurias, etc., para los cuales están los tribunales ordinarios. Así, con este concepto han abordado el asunto las legislaciones más adelantadas. Ahora bien, el jurado por su parte es y ha sido siempre, en todas partes del mundo, una institución de origen esencialmente popular y por lo tanto electivo. Jamás puede ser constituido por nombramiento del gobierno, porque eso importaría convertir a este en juez y parte. Tal es precisamente lo que está sucediendo en San Juan, debido a una ley monstruosa aplicada por un gobernante impulsivo. La prédica de la oposición sanjuanina y la de todos los diarios de la república que han hecho de esto una causa de solidaridad periodística, debe encaminarse en primer término a conseguir la derogación de la ley que consiente semejantes atropellos y uno de los mejores caminos a seguir sería el de demandar su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte" (*El Diario*, 14-III-1910).

<sup>7969</sup> "...El Sr. P. P. Ramírez, director del diario San Juan, ha sido encarcelado por el Gobernador Sarmiento, y se le hace cumplir su pena en un calabozo. Los otros periodistas están esperando el turno de seguir la misma suerte de todo lo que resulta la falta de control para los actos del gobierno más calamitoso que existe en la república. Y lo peor del caso es que el Gobernador Sarmiento tiene la ley de imprenta que necesita. Ella le faculta para elegir el jurado, calificar el delito, y luego ejecutar la pena. Ahí, en la reforma de esa ley de imprenta monstruosa está la bandera que debe agitar la oposición sanjuanina, porque mientras ella no se derogue, será un mito allí la libertad más indispensable a la vida democrática" (*El Diario*, 12-III-1910).

<sup>7970</sup> *La Nación* y *El Pueblo*, Sábado 11-I-1902.

<sup>7971</sup> Zorraquín Becú, 1961, 52, 59 y 63.

<sup>7972</sup> Llama la atención que Di Meglio ignore la obra de Pimenta, 2002.

<sup>7973</sup> Pimenta, 2002, 103-126, y 211-214.

<sup>7974</sup> Di Meglio, 2006, 98, 101 y 105

<sup>7975</sup> Di Meglio, 2006, 133.

<sup>7976</sup> Ternavasio, 2007, 180-183.

<sup>7977</sup> Di Meglio, 2006, 189.

<sup>7978</sup> Di Meglio, 2006, 205. Es una pena que Di Meglio no haya consultado el trabajo de Ocampo (2003), quien aporta elementos y reflexiones que pudieron haberle ayudado a entender este crucial episodio de la historia Rioplatense.

<sup>7979</sup> Di Meglio, 2006, 230 y siguientes.

<sup>7980</sup> Di Meglio, 2006, 295.

<sup>7981</sup> Di Meglio, 2006, 317.

<sup>7982</sup> para estudiar el caso del auge y declinación del poder regional, ver Palacio, 1983; y Waldow, 1994.

<sup>7983</sup> parafraseado de Morrow, 1991, 907. Sobre el origen colonial de la relación entre el poder central y la realidad provincial, ver Hamnett, 2000.

<sup>7984</sup> Morrow, 1991, 907.

<sup>7985</sup> esta cuestión de la conflictividad interna versus la conflictividad externa se debatía entre quienes sostienen la independencia absoluta o ligera correlación entre ambos conflictos (Otterbin, 1968; Rummel, 1968; y Tanter, 1966) y quienes hallaron una correlación positiva entre ambos (Haas, 1965; Sipes, 1973; Hazelwood, 1973; Wilkenfeld, 1968, 1973; y Stohl, 1980), citados en Ross, 1995, 164.

<sup>7986</sup> Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; y Prelooker, 1996, 55.

---

<sup>7987</sup> La cuarta ola progresiva, estuvo compuesta por cuatro etapas. En su primer fase, que arrancó con Caseros (1852) y concluyó con Pavón (1862), los conflictos políticos se zanjaron fundamentalmente a través de la secesión política y la violencia armada y secundariamente mediante el fraude electoral, la lucha parlamentaria y periodística, la negociación internotabiliar o las reivindicaciones agrarias y religiosas. Los conflictos políticos más graves se dieron en esta etapa en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Tucumán. En una segunda etapa que se inició en Pavón (1862) y se consolidó en San Jacinto (1867) y Pozo de Vargas (1867), los conflictos políticos se ajustaron fundamentalmente a través de una violencia armada institucionalizada entre un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja y Santa Fé. En un tercer período que se inició en San Jacinto y Pozo de Vargas (1867) y se interrumpió en La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se resolvieron a través de una violencia armada institucionalizada entre cuerpos de un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Cuyo, Catamarca, La Rioja y el Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos). Y en un cuarto y último período, dentro de la cuarta ola progresiva, que se inauguró en 1877 con la amnistía por los hechos de La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), los conflictos políticos heredados de la década del 60 se amortiguaron a través de una política denominada de Conciliación.

<sup>7988</sup> para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 4. En el tercer ciclo de Rivarola (1936), la idea-fuerza de la unidad nacional, iniciada en 1851, estalla en Pavón (Rivarola, 1936, 157).

<sup>7989</sup> Acuña, 1995a, 19.

<sup>7990</sup> ver Saguier (1995a y 1995b). El Prof. Darío Roldán me manifestó en una comunicación personal que todos los exilados que pasaron por Francia se contactaron y leyeron a los Doctrinarios (Guizot, Rémusat, Cousin, Roger-Collard, etc.). Para más detalles, ver las Actas del Coloquio sobre Guizot, los Doctrinarios y la Prensa, en Fondation Guizot-Val Richer (1994).

<sup>7991</sup> Ver Renouvin, 1990, Libro II, Cap. VIII. En el siglo XIX se pensaba no solo que cada nación merecía un estado sino que cada estado debía representar una nación. Asimismo la división del mundo en estados nacionales creaba una presión continua para la gestación de nacionalismos (Calhoun, 1993, 399).

<sup>7992</sup> ver Lafont, 1935; Levene, 1946, 1954-58; Canal Feijóo, 1955; y Myers, 1993. Sobre la educación primaria, ver Newland, 1992. Acerca de las virtudes y los legados del cristianismo, el liberalismo y el republicanismo en el discurso político norteamericano temprano, ver Kloppenberg, 1987. Para una periodización de la ética y la moralidad política en el gobierno norteamericano desde los tiempos coloniales, ver Locke, 1995.

<sup>7993</sup> para comparar con las guerras civiles en Chile en ese período, ver Vitale (1971).

<sup>7994</sup> sobre los ferrocarriles, ver Goodwin, 1977; y Damus, 1978.

<sup>7995</sup> ver Kroeber, 1957, capítulo 10; Kroeber, 1967; Rey, 1970, 130-131; Ruiz Moreno, 1970; García Heras, 1980; y Rey Nores y Rey Nores, 1994. Acerca de la libre navegación de los ríos en otras partes del mundo, ver Tyler, 1939; Taylor, 1977; y Szostak, 1991. Para el impacto negativo que los métodos tradicionales de transporte terrestre tuvieron sobre el dinamismo de una economía, ver Ringrose, 1972; y Gesualdo, 1986. La referencia del ensayo de María Ebelia Rey la debo a la gentileza del Doctor Enrique Wedovoy.

<sup>7996</sup> sobre la producción, transporte y comercialización de arena y piedra para la industria de la construcción de Buenos Aires, ver Vitali, 1990; Piantanida y Rossi, 1990; y Brá, 1990.

<sup>7997</sup> sobre el alambrado, ver Sbarra (1964) y sobre las armas de fuego, ver Demaría (1972).

<sup>7998</sup> sobre la salubridad y los saladeros, ver Cremona, Saab y Suárez, 1986.

<sup>7999</sup> Rostow, 1975, 753, nota 74; y Stewart, 1993, 131-133.

<sup>8000</sup> en especial el del Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza (suegro del Gobernador de Buenos Aires Valentín Alsina).

---

<sup>8001</sup> Moreno, 1925; y Magariños de Mello, 1952.

<sup>8002</sup> Soares de Souza, 1966. El derecho de los brasileiros a la navegación del Río Paraguay se asemejaba al derecho que en su momento alegaron los Belgas y su puerto de Amberes a la navegación del Río Escalda (Rey, 1970, 155).

<sup>8003</sup> Halperín Donghi, 1969, 1985, 167; Lisiero, 1971; Bandeira, 1985; Romero Carranza, Rodríguez Varela, y Ventura, 1993, II, 269; y Maiztegui, 1994, 54.

<sup>8004</sup> una suerte de Primer Guerra de la Triple Alianza, por ser producto de la coalición formada entre el estado de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil. Para el comercio y política mercantil del Oriente entrerriano en tiempos de guerra, ver Schmit, 2002-2003.

<sup>8005</sup> Con motivo del rechazo del Acuerdo de San Nicolás, Urquiza había ordenado la disolución de la Legislatura porteña. La elite porteña se había fraccionado en dos gruesas corrientes, la una denominada chupandina, constituida por los federales o reformistas porteños, y la otra llamada pandillera, formada por los liberales o Ministeriales. Los pandilleros, a su vez, aparecen fraccionados entre los liberales-conservadores, agrupados en torno al Club del Pueblo, encabezado por Bartolomé Mitre, y los liberales-progresistas o liberales-radicales, cuyo vocero periodístico fué La Tribuna, dirigida por Héctor C. Varela, y donde colaboraba el oriental Juan Carlos Gómez (Romero Carranza, et. al., II, 1081-1082). A semejanza del Acuerdo de San Nicolás, los caudillos Orientales Manuel Oribe y Fructuoso Rivera sellaron en 1855 un acuerdo titulado el Pacto de la Unión.

<sup>8006</sup> Romero Carranza, et. al., II, 289.

<sup>8007</sup> El Convencional Constituyente santiagueño Benjamín Lavaysse se lamentaba ante Manuel Taboada y maldecía de Tucumán por no haber sido la provincia que primero madrugara a Urquiza y la Confederación en el operativo de secesión (B. Lavaysse a M. Taboada, Paraná, 7-II-1853, en Taboada, I, 112). Es interesante señalar que si bien García Soriano (1968) reproduce esta significativa carta omite precisamente este párrafo (García Soriano, 1968, 46).

<sup>8008</sup> Para su comparación con el proceso constituyente Norteamericano, ver Saguir, 1996.

<sup>8009</sup> El Senador Rafael Igarzábal, en oportunidad de debatirse la intervención a Corrientes, en 1878, manifestó que: "...al dictarse la Constitución salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la tiranía; y nuestros constituyentes, señor Presidente, temieron que cualquier provincia argentina cayera bajo las garras de un mandón sin plazo y sin responsabilidad, como Rosas y demás caudillos de esa época, que de todo podían tener menos de republicanos" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.194).

<sup>8010</sup> Scobie, 1964, 265; y Grondona, 1967, 136. El Senador Aristóbulo del Valle, en la misma sesión, definió a la intervención como "...la realización de la garantía que el Gobierno Federal debe a cada uno de los estados. Esa garantía se efectúa, en unos casos en favor de los pueblos, y en otros, en favor de las autoridades constituidas. En unos casos, para defender los principios del Gobierno libre, conculcados, cuando la forma republicana de gobierno está amenazada; en otros, para sostener a los gobernadores y autoridades constituidas, que amenazan ser depuestos por la sedición" (Senador Aristóbulo del Valle, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.163).

<sup>8011</sup> Era correntino, hijo de Juan Ascencio Virasoro y Maria Mercedes Corrales y Casajús, marido de Elena Gonsález de la Madrid, y padre de Alejandro Virasoro (Cutolo, VII, 684).

<sup>8012</sup> La incursión colorada procedente del Estado de Buenos Aires, al mando del Gral. César Díaz, fué diezmada en 1858 en el Paso de Quinteros, episodio conocido como la Hecatombe de Quinteros. Los detalles de esta tragedia pueden verse en Sierra (1884) y Moreno (1925) y en la frondosa polémica suscitada recientemente entre Víctor Rodríguez Otheguy y Nelson Dellepiane por un lado, y M. A. Gaztambide Aguirre, Lincoln R. Maiztegui Casas, y Jorge Pelfort por el otro, y donde el que suscribe también tuvo participación, en el semanario oriental Búsqueda (Montevideo), desde su n. 830, correspondiente al 8 de febrero de 1996, hasta el n. 850, del 27 de Junio de 1996.

---

<sup>8013</sup> Scobie, 1964, 295.

<sup>8014</sup> profundamente desprestigiado por haber dado la orden de ejecutar sumariamente a Juan Crisóstomo Alvarez.

<sup>8015</sup> sobrinos carnales del difunto caudillo Juan Felipe Ibarra.

<sup>8016</sup> García Soriano, 1968, 26, 29 y 33.

<sup>8017</sup> García Soriano, 1968, 64.

<sup>8018</sup> García Soriano, 1968, 132.

<sup>8019</sup> hijo de Tadeo Rojo y de Gertrudis Frías y tío del Gobernador de San Juan Camilo Rojo (Cutolo, VI, 348). Su mujer Dámasa de Alvarado Poveda, era una Jueña hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda Isasmendi, prima del Gobernador José Uriburu Poveda y pariente del Gobernador José María Todd (h) (Fernández Lalanne, 1989, 77).

<sup>8020</sup> nacido en Monteros en 1826, hijo de Leopoldo del Campo y de Manuela de la Peña.

<sup>8021</sup> ver Páez de la Torre (h) (1968). Estas dos familias se caracterizaban por descender de cabildantes que en tiempos de la colonia tardía pertenecieron a la facción anti-ministerial, partidaria del comercio libre, y por tanto opuesta al monopolio comercial español. Tanto Manuel Posse como su suegro Fermín Vicente Texerina, quien también era abuelo materno del padre de Julio A. Roca, pertenecieron a dicha facción.

<sup>8022</sup> apoyada entre otros por los Tucumanos Nabor Córdoba, Julián Murga, y las familias de los Gallo, los Colombres y los Terán; así como por los Salteños Aniceto Latorre, Pedro José Frías, (a) "Peque", Martín V. Cornejo, Francisco Centeno, Alejandro Figueroa, Solano Cabrera, Damián Torino Santibáñez, el Teniente Coronel Juan Solá Chavarría, "...los Ramayo, Algañaraces, Villagrán, y según se cree también el Gral. [Celedonio] Gutiérrez, todos estos colocados en alta graduación de Generales y Coroneles" (Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864, Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Firmado por Frías, Cornejo, Figueroa, Zenteno, y otros, se repudiaba en un Manifiesto el hecho de que una familia Salteña (los Uriburu) se aprovechara de la victoria de Pavón para alcanzar el monopolio de la función pública asegurando una renta de \$20.000 anuales a hermanos, primos, y sobrinos (Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92).

<sup>8023</sup> primo segundo de Pedro José y Jaime Lami y tío tercero de los Vieyra Lami.

<sup>8024</sup> hijo sacrilego del R.P. Pedro León Gallo (Información que debo al Dr. Carlos Jáuregui Rueda), marido de Magdalena García Achával, hija de José Antonio García y de Restituta Achával Medina (Calvo, III, 275).

<sup>8025</sup> hijo de Pedro Antonio de Zavalía y Andía y de María Josefa Lami; marido de Genuaria Iramain Gallo y de Emilia López y Basaga; cuñado del Gobernador Agustín Alurralde Ojeda; padre del Gobernador David Zavalía Iramain y del Interventor en Tucumán Salustiano Zavalía Iramain; y suegro del Gobernador de Tucumán Uladislao Frías Gramajo.

<sup>8026</sup> Bazán, 1992, 77. Con motivo de la reposición de Alcorta por la Sala de Representantes, Manuel Taboada le escribe a Próspero García, manifestándole que Alcorta "...teme el país que desea gobernar". De esta forma "...mientras lleva su queja, que no puede ser oída en el Paraná, corre el tiempo, se cumplen pronto los cuatro meses previstos en la Constitución y se nombra otro Gobernador que más lejitimamente y según los deseos del país, lo reemplaze en ese destino. Así concluirá la esperanza de la mazhorca en este país y quedarán satisfechas las exigencias del país, pues ha costado trabajo hacerlo entrar en el camino que deseábamos, porque todos estaban firmes en no ceder nada al Comandante Nacional" (Manuel Taboada a Próspero García, Santiago del Estero, 16-XII-1860, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). El Ministro de Gobierno Absalón Ibarra le escribía a Próspero García que si Alcorta, moralmente abatido por el triunfo de Aberastain en San Juan, se resolvía a volver el Partido Liberal "...le ha de pedir que respete la ley que lo suspende en el ejercicio de sus funciones, y así quedará todo arreglado, neutralizando los efectos de una ley con otra ley, y entonces ya no tendrá el Gobierno Nacional ni pretexto para intervenir" (Absalón Ibarra a Próspero García, Santiago del Estero, 9-XII-1860, AGN Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). Asimismo, Ibarra le advertía a García, que desde el instante en que se supieron los sucesos de San Juan,

---

han quedado los mazhorqueros "...más abatidos, pues ven que la mazhorca vá desgranándose en todas direcciones, mientras que el triunfo del partido liberal es indudable en toda la República. Si el repuesto Gobernador [Alcorta] viniese a asumir el mando de la Provincia, es muy probable que el Jefe de la Escolta que lo acompañe sea el portador del aviso de que queda ya suspenso; es así que la reposición vá a servir, para hacer una nueva disposición, no ya a garrote sino por la ley y en nombre de la ley" (Absalón Ibarra a Próspero García, Santiago del Estero, 9-XII-1860, AGN Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8027</sup> Ver Manuel Zavaleta, "Conferencia de Albigasta", *El Liberal* (Tucumán), 26 y 29-III-1863 y 2-IV-1863, Nos. 124, 125 y 126.

<sup>8028</sup> hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata García, aquella heroína que rescatara de la pica la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán.

<sup>8029</sup> Lizondo Borda, 1948, 101-103 y 106ss.; y Gutiérrez, 1961, 73-88; citados por Cutolo, II, 79. Justificando esa revolución, el Vice-Presidente Marcos Paz le manifestaba a Próspero García que "...sin duda Zavalía olvidó su primer deber al entregar las prerrogativas provinciales a lo que se llamaba autoridad Nacional y que por consiguiente la revolución que Vd. promovió fué justa y legítima si Tucumán se hubiere aliado a Santiago, Salta y Jujuy, como yo les aconsejé al solo objeto de salvar la soberanía provincial de los avances arbitrarios de Derqui, el país se hubiera salvado, sin las ruinas que hoy lloramos" (Marcos Paz a Próspero García, Córdoba, 3-I-1862, AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8030</sup> Bazán, 1992, 78; y Posse, 1993, 70

<sup>8031</sup> Integrado por los Torres, los Yofre, Bustos, Losa, etc. (Madero, 1982, 1a. parte, p.213.). Su Jefe era el Dr. Alejo Carmen Guzmán y sus principales hombres lo formaban: Manuel Lucero, Agustín San Millán, José Pío Achával, Jerónimo Yofre, Francisco Loza, Jerónimo Cortés, Fernando Félix de Allende, Eduardo Ramírez de Arellano, Marcos Figueroa, José M. López, José Severo de Olmos, Clemente Oliva, José María Díaz Rolón, Calixto Ordóñez, Tristán Achával, Pedro Serrano, Clodomiro Oliva, Ceferino Núñez, Severo Obregón, Aristides Aguirre, Domingo Garay y otros de destacada actuación (Díaz de Molina, 1972, I, 55). La denominación de Rusos obedecía a la terminología adoptada en la Guerra de Crimea.

<sup>8032</sup> contaban con el apoyo decidido de la Sociedad Terpsicore, que agrupaba a los artesanos (Pavoni, 1993, 175).

<sup>8033</sup> Peña, 1966, 464. Según *El Progreso*, de Córdoba, en una extensa nota titulada "El partido mashorquero y el Club de la Juventud", publicada en Octubre de 1867, aclaraba que "...es un error confundir el partido mashorquero pure sang del año 40 con el partido denominado Ruso, que existe después de Caseros, y fué formado de elementos contrarios a la tiranía de Rosas. El partido mashorquero de Córdoba, el de color definido que no se confunde con ningún otro, es el círculo del año 40, que después traicionó a su jefe y bienechor el Gobernador López y se pasó a los que vencieron en Caseros. Los Cáceres [Santiago y Luis], los Peña [Cleto, Clímaco y Félix], los Peñalozas [Nicolás], los López [Augusto, Tiburcio y José Martín] que se dicen hoy del partido liberal, eran la encarnación del partido federal. Eran los que rodeaban el Gobierno de Don Manuel López, los que asediaban sus antecámaras y su familia, a cada hora, y los que explotaban el Gobierno para labrar la fortuna de que hoy gozan. Unos como Ministros enviados por López cerca del tirano, otros como negociantes y explotadores de los ramos que vendía el Gobierno (como si dijéramos proveedores hoy) otros como Diputados en la Sala para sancionar, en nombre del pueblo, la proscripción y el esterminio del partido unitario, he ahí los prohombres de lo que hoy se llama para sarcasmo y calculado anacronismo, partido liberal de Córdoba" (*El Progreso*, Martes 8-X-1867, año I, n.26).

<sup>8034</sup> Bruno, 1967, t.X, 2a. Parte, Secc.I, Cap.II, pp.341-343; Martínez, 1970; y Pavoni, 1993, 68.

<sup>8035</sup> cuñado de Manuel y Filemón de la Lastra, padre de los Senadores Provinciales Mariano y Julio Fraguero Lastra, y suegro del Senador Provincial Pedro Funes y Moldes.

<sup>8036</sup> Pavoni, 1993, 281-282.

<sup>8037</sup> suegro del Diputado Nacional Nicolás Peñaloza Baras y del Senador Provincial Angel Altamira.

---

<sup>8038</sup> Peña, 1966, 468. El Senador Rafael Igarzábal recordaba en 1882 en el Senado de la Nación la estoica actitud de resistencia adoptada frente al secuestro por el Gobernador de Córdoba Mariano Fraguero (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151).

<sup>8039</sup> Scobie, 1964, 349.

<sup>8040</sup> Scobie, 1964, 128 y 335.

<sup>8041</sup> hijo de José Norberto de Allende Ascasubi y de Petrona Goicochea; hermano del Senador Provincial Juan Martín de Allende y Goicochea; y tío del Senador Provincial José Segundo de Allende y Goicochea, y del Diputado Nacional Luis Maximiliano de Allende y Goicochea.

<sup>8042</sup> padre del Gobernador Provisorio y Senador Nacional José Vicente de Olmos y Freites; del Senador Provincial Gral. Ramón I. Olmos y Prado (SP/Cruz del Eje, 1917-21) y de los Diputados Provinciales Dermidio y Alfredo Olmos de Aguilera (Cutolo, V, 163; y Lazcano Colodrero, I, 370 y 372).

<sup>8043</sup> hijo de Juan Gregorio de Achával Castellanos y de Clara Ezcurra; marido de Rosa Yofre y de Pastora Rodríguez Ladrón de Guevara; primo hermano del Gobernador de Córdoba José Pío Achával Iramain; y padre del Diputado Nacional Tristán Achával Rodríguez (DN.1874-76; 80-84).

<sup>8044</sup> Peña, 1966, 471.

<sup>8045</sup> de origen santiagueño.

<sup>8046</sup> hijo del Gobernador José Blas Achával Castellanos y de Jacoba Iramain Aranda; marido de su prima hermana Rosaura Achával; y primo hermano del Gobernador Tristán Achával Ezcurra.

<sup>8047</sup> Madero, 1982, 1a. parte, p.213.

<sup>8048</sup> Compilación de Leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba desde 1810 a 1870 (Córdoba),..., t.I, 188-189, citado en Pavoni, 1993, 167.

<sup>8049</sup> luego de la Reforma Constitucional de 1861 se transformó en el art.64.

<sup>8050</sup> Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 18 Sesión Ordinaria, 7-VII-1857, p.103; y 30 Sesión Ordinaria, 29-VII-1857, p.147-154. Ver asimismo, Pellet Lastra, 1995, 104-105. Diez años más tarde, en 1867, se consideró el proyecto del Senador Martín Piñero (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 18-VI-1867). Quince años después, en 1882, el Diputado por Salta Abel Ortiz presentó un proyecto por el cual ningún miembro de los tres Poderes podrá tener participación en contratos con la Nación (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1882, t.I, p.772). Otros diez años después, en 1891, el Diputado Nacional Salvador Maciá debió dejar su banca por asumir el Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 24-VII-1891, 21 Sesión Ordinaria, p.369).

<sup>8051</sup> hijo de Clemente Segura Gamboa y de Manuela Corvalán de Castilla y Mayorga; sobrino del Gobernador Gral. José Félix Aldao Anzorena (GD.1840); marido de Manuela García y de Rosa Galdámez; padre del Gobernador José Miguel Segura Galdámez; y suegro del Senador Nacional Martín Zapata Coria (SN.1854-60) (Calvo, V, 180, 185 y 186; y Cutolo, VII, 57 y 60).

<sup>8052</sup> Martínez, 1979, 95. Con motivo de haber dado orden de fusilar a un detenido adicto a Rosas, sin juicio previo, fué a su vez enjuiciado y condenado a muerte, de resultados de lo cual se refugió en Chile, para volver luego de Caseros (Cutolo, IV, 698). Era hijo de Antonio Moyano Godoy y de Juana Videla Godoy, y primo hermano del malogrado Gobernador Gral. José Videla Castillo.

<sup>8053</sup> hijo de Juan Agustín Maza Sotomayor, muerto en la masacre del Chacay; y sobrino del Gobernador Juan Isidro Maza.

---

<sup>8054</sup> sobrino del Fraile Aldao; cuñado de los Diputados Provinciales Aureliano, Estanislao y Primitivo Reta Peralta; y primo segundo del Cnel. Juan Saa (a) "Lanza Seca" (Morales Guinazú, 1939, 278 y Scobie, 1964, 312).

<sup>8055</sup> Martínez, 1979, 100.

<sup>8056</sup> hijo de Justo Correas y Ana Ortiz, sobrino carnal del Gobernador Juan de Dios Correas (1824-29), sobrino político del Alcalde Bernardo Ortiz y del Tte. Cnel. Francisco Xavier de Rosas, y nieto del Alcalde de primer voto Pedro Nolasco Correas (Morales Guinazú, 1939, 73; y Cutolo, III, 187; y V, 212).

<sup>8057</sup> Martínez, 1979, 100.

<sup>8058</sup> hijo de Juan Matías de Videla y Godoy y de Petrona Moyano Moyano; marido de Zoila Videla Segura; cuñado del Diputado Provincial Nicolás Guinazú Ortiz de Ocampo (DP.1859); primo hermano de los Gobernadores Juan de la Cruz Videla, fundador de la Villa de Maipú, y de Luis Molina Videla y de los Diputados Nacionales Agustín y Daniel Videla Correas; y suegro del Diputado Nacional Matías Godoy Barraquero (DN.1898-02) (Calvo, II, 347; y IV, 347; Cutolo, IV, 696; Funes, 1951, 35-53; y Zinny, 1920, IV, 97).

<sup>8059</sup> Martínez, 1979, 105. Sobre el terremoto de Mendoza de 1861, ver Cueto, Comadrán Ruiz y Ceverino de Rodríguez (1991). A los efectos de la comparación con el terremoto de San Juan de 1894, ver Videla, 1988. El terremoto de San Juan, de 1894, también alcanzó a La Rioja, pues consta que destruyó a su Iglesia Matriz (Reyes, 1916, 71).

<sup>8060</sup> Sommariva, 1929-31, 9-16 y Videla, 1974. El Coronel Nazario Benavidez era de prosapia colonial, hijo de Pedro Benavidez y de Juana Paula Balmaceda, y casado con Telésfora Borrego, hija de Pascasio Borrego Jofré y de María de los Angeles Cano de Carvajal (Cutolo, I, 409; y Videla, 1976, IV, 92).

<sup>8061</sup> Gandía, 1971, 25.

<sup>8062</sup> por referencia a la famosa novela de García Márquez Cien Años de Soledad.

<sup>8063</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.VI, Secc.I, p.407. Yanzi era cuñado del Gobernador Santiago Lloveras (GI, 1864/57); y suegro del Gobernador y Senador Nacional Domingo Ignacio Morón Cortínez (GP.1893-95 y SN.1895-1913).

<sup>8064</sup> Del partido beato o pelucón (llamado así por su antigua afición a los Jesuitas expulsos), muy semejante al partido de los Conspicuos de Jujuy, propuso a Timoteo Maradona, Miguel Echegaray y Saturnino Manuel de Laspiur, y del de los marranos o pipiolos a Guillermo Rawson, Tadeo Rojo, Eugenio Doncel, Indalecio Cortínez y Antonino Aberastain (Videla, 1962-90, IV, Cap.VI, Secc.II, p.437). La facción beata o ministerial, así denominada por ser partidaria del monopolio comercial español, estaba dirigida en el último período colonial por Francisco Borja Vicentelo de la Rosa, y lo formaban los cabildantes Lucas Robledo, José Clemente Riveros, y Pedro Carril (el padre de Salvador María y José María del Carril). Este grupo era el económicamente más poderoso no sólo por poseer extensos viñedos, sino también por ejercer el comercio con Buenos Aires. Sin embargo, con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778), esta facción vio erosionado su poder económico, dando lugar al crecimiento de otro sector social, que no tardó en manifestarse en el Cabildo, denominado marrano o anti-ministerial, y compuesto por José Ignacio Maradona, José Ortiz Santibañez, Francisco Gregorio Blanco Jofré y el Dr. Estanislao Tello. Como vemos en el transcurso de un siglo, la filiación marrana del cabildante José Ignacio Maradona, se torna beata o pelucona en la persona de su nieto Timoteo Maradona.

<sup>8065</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.VI, Secc.II, p.423-439.

<sup>8066</sup> cuñado del Gobernador Francisco T. Coll (GPv.1860/62) y primo político del Gobernador Manuel José Gómez Rufino (GP.1857) (Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25).

<sup>8067</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.VII, Secc.IV, pp.496-506; y Bruno, 1967, X, 513-530.

<sup>8068</sup> cuñado del Gobernador Saturnino Manuel Laspiur Quintana, (GI.1848); tío del Diputado Nacional

---

Saturnino María Laspiur Gómez (DN.1854-62); marido de Dolores Albarracín; primo político de Domingo F. Sarmiento y del Gobernador Cnel. Francisco Domingo Díaz Oro (GI.1855/61); y tío político del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín (Videla, 1962-90, IV, Cap.VIII, pp.523).

<sup>8069</sup> Scobie, 1964, 226.

<sup>8070</sup> encabezado por Pedro Celestino Oro y seguido por Indalecio Cortínez, José Eugenio Doncel, Zacarías A. Yanzi y Valentín Videla (Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.III, p.533).

<sup>8071</sup> designado por el Presidente de la Confederación Gral. Justo José de Urquiza.

<sup>8072</sup> ver Gómez, 1921; y Heras, 1937-38.

<sup>8073</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.IV, pp.553-564.

<sup>8074</sup> Scobie, 1964, 228.

<sup>8075</sup> hijo del Gobernador Saturnino Manuel de Laspiur y de la Quintana (GP.1848); y sobrino de los Gobernador Cnel. José María Oyuela Negrón (GD.1841/43); y Manuel José Gómez Rufino (Videla, 1962-90, IV, Cap.VIII, pp.523).

<sup>8076</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.IX, Secc.III, p.581.

<sup>8077</sup> Scobie, 1964, 291.

<sup>8078</sup> Sommariva, 1929-31, 60-66; y Videla, 1962-90, IV, Cap.IX, Secc.IV, pp.600-610.

<sup>8079</sup> Scobie, 1964, 306.

<sup>8080</sup> cuñado del Cnel. Francisco Domingo Díaz Oro (GI.1855/61) (Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25).

<sup>8081</sup> Sommariva, 1929-31, 87-94. Era hijo de Luis de Arbestayn y de Manuela de la Rosa y Torres. Su madre era prima hermana del Gobernador José María del Carril.

<sup>8082</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc. I, pp.611-25. Era hijo de Clemente de Videla y Barreda, propietario de Angaco, y de Isabel de Lima y Cano de Carvajal; marido de Jesusa Maradona Videla; y primo hermano del Cnel. Luis Videla Guardiola.

<sup>8083</sup> Videla, 1962-90, t.IV, Cap.X, Secc.III, pp.643-666. Extrañamente, Shumway (1993) menciona las muertes de Benavidez y de Virasoro, pero omite la de Aberastain (Shumway, 1993, 246). El primer combate celebrado en la Rinconada del Pocito, denominado de Las Leñas, ocurrió en 1825, en oportunidad en que el ex-Gobernador Salvador María del Carril invadió San Juan desde Mendoza (Videla, 1990, III, Cap.XI, Secc.IV, 647-664).

<sup>8084</sup> cuñado del Gobernador Francisco T. Coll (GPv.1860/62); y primo político del Gobernador Manuel José Gómez Rufino (GP.1857) (Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25).

<sup>8085</sup> cuñado del Senador Nacional y Gobernador José Tomás Albarracín Allende (GI.1829); y primo hermano del Senador Nacional y Gobernador José M. del Carril de la Rosa y Torre (GP, 1869).

<sup>8086</sup> Videla, 1962-90, IV, Cap.XII, Secc.II, p.715.

<sup>8087</sup> Sobre el coronel Cáceres, ver Buchbinder, 2004, 88-100.

<sup>8088</sup> Matienzo, 1910, 255; y Castello, 1991, 390.

---

<sup>8089</sup> hijo de Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Tomás y Patricio Cullen; y cuñado del Gobernador Nicasio Oroño Baigorri (GP.1865) y del Dr. Juan María Gutiérrez.

<sup>8090</sup> Pasquali, 1994, 322. José María Cullen era hijo del mártir Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno. Acerca de la familia Cullen y su oportunismo político, ver Bonaudo y Sonzogni, 1992, 81.

<sup>8091</sup> hijo del Gobernador mártir Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno y hermano menor de José María Cullen.

<sup>8092</sup> primo del Gobernador Pascual Echagüe, nieto de Narciso Javier de Echagüe y de María Teresa Ruiz de Arellano, y sobrino-nieto de los Alcaldes Lucas y Melchor de Echagüe y Andía. Existía en Santa Fé en tiempos coloniales una vieja antinomia entre la casa de los Echagüe, tradicionalmente ligada al comercio de la yerba mate, y la casa de los Aldao, vinculada al comercio de mulas con el Alto Perú.

<sup>8093</sup> Los hermanos Benito, Carmen, y Mercedes Freyre Rodríguez del Fresno se hallaban casados respectivamente con los hermanos Manuela, José Buenaventura y Demetrio Iturraspe Freyre (hijos de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno (Calvo, II, 36); los hermanos Tomás, Patricio, Domingo y Guillermo Cullen Rodríguez del Fresno también se hallaban casados respectivamente con Josefa Comas y López Rodríguez del Fresno, Elena Iturraspe Gálvez, Francisca Crespo Rodríguez del Fresno, y Tomasa del Rosario Iriondo Candioti; los hermanos Domingo y Francisca Crespo Rodríguez del Fresno se hallaban casados respectivamente con Zenaida Iriondo Candioti y Domingo Cullen Rodríguez del Fresno; y el Coronel Agustín Jerónimo Iriondo Candioti se hallaba casado en 1870 con Vicenta Iturraspe Freyre (Cuadro F-IV).

<sup>8094</sup> Beezley, 1969; y Andrews, 1985.

<sup>8095</sup> Scobie, 1964; y Fontana, 1977.

<sup>8096</sup> ver Saguier (1995a, 1996a y 1996b); y Tognetti, 1996.

<sup>8097</sup> Es nuestra hipótesis que en el segundo ciclo democrático (época de la Organización Nacional, 1862-80) el discurso clientelístico clánico (padrinazgo nepótico) fué instrumentado por las oligarquías centrales y provinciales para promover tanto la unidad nacional y el control estatal central como la misma unidad provincial. La implementación del discurso clientelístico clánico (padrinazgo nepótico) condicionaba a las burguesías comerciales y a las oligarquías políticas departamentales, si pretendían operar con la metrópoli provincial, a ir al pie de la oligarquía provincial, y si estas últimas pretendían operar con la metrópoli central, debían ir al pie de la oligarquía porteña. Lacoste (1990) sostiene que dicho discurso fué también implementado por las oligarquías provinciales para promover la unidad provincial entre los numerosos departamentos y regiones que las constituían (Lacoste, 1990, capítulo V).

<sup>8098</sup> En cuanto a la elite cultural dominante: sobre la música argentina, ver García Acevedo, 1961; sobre la recepción de la operística verdiana en el mundo, ver Robinson, 1985; y Said, 1993, 111-131; sobre la daguerrotipia, ver Riobó, 1949; sobre la litografía, ver González Garaño, 1933 y 1943; sobre la retratística porteña, ver Ribera, 1982; sobre el periodismo en general y la libertad de imprenta, ver Lettieri, 1994; y Saguier, 1995d; y sobre la pintura, para Tucumán, ver Trostiné, 1952; para Mendoza, ver Romera de Zumel, 1971; y para Buenos Aires, ver Payró, 1961; y Gil, 1961. Esta elite si bien ejerció un notorio dominio cultural, no logró ejercer una hegemonía sobre la cultura, el arte y la política subalterna, que en parte fué producida por miembros marginados de la elite, tal como fué el caso de José Hernández durante su militancia Jordanista y su exilio en Brasil, desde donde escribió el poema épico Martín Fierro. Sobre el periodismo de José Hernández, ver Halperín Donghi, 1985b; sobre la impronta de resistencia y el sentido social del Martín Fierro, ver Paoli, 1947; Martínez Estrada, 1948; Ramos, 1961; Astesano, 1963; Villanueva, 1972; Paz, 1974; Verbitsky, 1976; y Cárdenas de Monner Sans, 1977; y sobre el mito gaucho y las generaciones desertoras del mismo, ver Astrada, 1948 y 1963. Sobre el rol de la música popular en la política y la guerra, ver el caso de la zamba de Vargas, en Gargaro, 1946-48; y Alén Lascano, 1971.

<sup>8099</sup> ver Saguier, 1996a; Tognetti, 1996; y Falletti, 1997, 29.

<sup>8100</sup> Acerca de las diferencias entre clase dirigente y clase dominante, ver Touraine, 1973, 30-35; y 1995, 102, 118 y 152; citado en Sidicaro, 1995, 335 y 338.

---

<sup>8101</sup> Sobre la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en Buenos Aires a fines del Siglo XIX, ver [Malosetti Costa](#), 2001. Sobre el debate entre Vicente Fidel Lopez y Bartolome Mitre acerca de la naturaleza debida en la historiografía nacional, ver [Madero](#), 2001. Sobre las tradiciones en pugna en la canonización estatal del Martín Fierro (1870-1940), ver [Cattaruzza y Eujanian](#), 2002.

<sup>8102</sup> Noble, 1960, 197; y Grondona, 1967, 73-76. El libro de Julio Noble, un dirigente político de filiación Demócrata Progresista, que frecuentara a Lisandro de la Torre, fué concebido en las cárceles del peronismo más como un compromiso cívico que político, y es el más completo y fascinante que se haya escrito sobre la segunda mitad del siglo pasado. En sus palabras liminares, Noble reconoce como origen de su obra tanto las constantes referencias de Lisandro a la vida de Leandro Alem, como a una suerte de mandato que De la Torre le hiciera poco antes de su infausta muerte. Sin embargo, una prolija lectura de la misma, revela en su trama la presencia de una tercera vida, que precede en el tiempo a las de los dos protagonistas principales de la misma, la de Bartolomé Mitre. Es extraño lo poco citado que es este libro. Hasta el momento he registrado que ha sido mencionado sólo por las obras de Duarte (1974), Cornblit (1975), Hardoy (1993) y profusamente por Romero Carranza, et. al. (1992). Por último, es de lamentar, la ausencia de las notas de pie de página que identifiquen el origen de las numerosas citas de época que contiene, procedentes en su mayoría de fuentes primarias editas (Colecciones Documentales de los Taboada, Marcos Paz, Archivo Mitre, periódicos, Diarios de Sesiones, etc). Por ello, sería recomendable encarar una nueva edición de la misma que incluya dichas notas. Por el contrario, la obra de Grondona (un texto muy poco citado), es una apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir de 1966; y una versión de la teoría de las generaciones muy influida por Ortega y Gasset, ver [Martínez de Codes](#), 1986, 132-133.

<sup>8103</sup> Por cierto, el Rosismo había tenido más y mejores contactos con la modernidad colonial-absolutista. Sus puntos de confluencia se redujeron para [Ternavasio](#) (1995), a la idea de unanimidad, la absorción en el poder ejecutivo de los demás poderes, y la noción pactista del poder ([Ternavasio](#), 1995, 26 y 27).

<sup>8104</sup> [Rusk](#), 1974, 1044.

<sup>8105</sup> parafraseado de [Morrow](#), 1991, 907.

<sup>8106</sup> [Morrow](#), 1991, 907.

<sup>8107</sup> En las sesiones de la Legislatura de Buenos Aires, autoconvocada en 1854 como Convención Constituyente del Estado de Buenos Aires, Mitre rechazó la idea de confederación y asoció la noción o el mito de la nación al mito de patria manifestando --en lo que luego fue la tesis central de su obra historiográfica y su proyecto político-- que "...hay una nación preexistente y esa nación es nuestra patria, la patria de los argentinos" ([Diario de Sesiones de la Sala de Representantes](#), Sesión del 7-III-1854, 24a. Sesión Ordinaria, p.41; cit. en [Ornstein](#), 1946, 363).

<sup>8108</sup> seguramente inspirados en la prédica unionista y anti-secesionista de Henry Clay y Daniel Webster, formulada en el debate de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acerca del Compromiso de Missouri (1861). Acerca del discurso Unionista de Webster, citado por el Senador Nacional Rafael Igarzábal en el debate parlamentario acerca de la intervención a la provincia de Corrientes en 1878, ver [Peterson](#) (1987), [Allen](#) (1989), [Smith](#) (1989) y [Current](#) (1992), a los cuales lamentablemente no he podido tener acceso. Es interesante observar que Mitre poseía la obra de Webster (1862), pues figura en la primera sección del Catálogo del Museo Mitre.

<sup>8109</sup> el partido Blanco se había dividido entre la facción de los Amapolas y la de los Vicentinos ([Maiztegui](#), 1994, 62).

<sup>8110</sup> ver [Conte](#), 1891; y [Ferrando](#), 1918. Dicha Cruzada, considerada por [Juan Carlos Gómez](#) como una reivindicación de los mártires de Quinteros (1858), obedeció fundamentalmente al intento del Gral. Venancio Flores, apoyado por el Imperio del Brasil y por Buenos Aires, de restablecer el equilibrio de la balanza del poder de la Cuenca del Plata, amenazado por los proyectos del Presidente Uruguayo Bernardo Berro. Berro consideraba que para enfrentar el centralismo de Buenos Aires, luego de su triunfo en Pavón, era preciso la segregación de la mesopotamia argentina (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) y su federación con Paraguay y Uruguay ([Cardozo](#), 1954, 36-39; citado en [Vidaurreta de Tjarks](#), 1962-67, 204-205).

<sup>8111</sup> Por Primer Guerra de la Triple Alianza entendemos aquella que culminó en Caseros (1852) como

producto de la coalición formada entre el estado de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil (ver Tjarks, 1977). Bandeira (1985) sostiene que lo que yo denomino la Segunda Guerra de la Triple Alianza arruinó al Brasil bloqueando su esfuerzo por industrializarse (Bandeira, 1985, 274-275; citado en Costa, 1995, 19-21). A propósito de la Guerra de la Triple Alianza y de un libro de Leon Pomer (1968) sobre la misma se suscitó en 1973 en el Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas una trascendental polémica entre José María Rosa (1964), amigo de John William Cooke, y Juan Pablo Oliver (1969, 1977), donde este último tomó partido por Mitre y Buenos Aires, y Ortega Peña y Duhalde (1969) por el Mariscal López y el Paraguay. Estos dos últimos autores señalaban que la Montonera de Felipe Varela, que distrajo las fuerzas destinadas a combatir el Paraguay, constituía una expresión de la "lucha de clases" del campesinado proletario contra la oligarquía terrateniente. Estos autores, con los que Rosa coqueteó, pertenecieron a la izquierda nacionalista del Peronismo Revolucionario, dirigían el periódico *Militancia*, y aunque ostentaron una actitud crítica frente a la Organización Montoneros tuvieron una responsabilidad indirecta en la gestación intelectual de la misma. Sobre la producción de Luis A. de Herrera en los orígenes de un relato revisionista sobre la Guerra del Paraguay, ver Reali, 2006. Sobre 'La masacre de 1869' en el Paraguay de López durante la Guerra y las familias de Concepción, ver Areces, 2006.

<sup>8112</sup> En carta a J. A. Roca, Rufino Ortega le informa que "...es un hecho que los Chilenos tienen población de este lado de la Cordillera, según verá por una sumaria que he levantado: en la expedición que hice, dejé hacia el lado de la Cordillera, a mi retaguardia, una población Chilena, en donde sabía se encontraban 80 soldados que llaman Pacos, y unos 300 Chilenos mas armados; mi primera intención fue atacarlos, pero no lo hice, porque en el periódico de esta, ví la noticia de que Don José Miguel Segura salía para esa, llevando los tratados de arreglos con Chile, y temí ocasionar algún trastorno al atacar esta población, que tiene un Subdelegado que obedece a las órdenes del Gral. Bulnes de Chile. Esta Población se llama Malbarco, y queda a medio día de camino de donde pasé. Los peores enemigos que tenemos son los Chilenos, pues estos arman a los indios en nuestra contra, y aún ellos mismos nos ostigan" (Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 6-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Y en carta a J. A. Roca, Luis F. Aráoz le relata que "...conversando de la expedición al Río Negro, un Sr. venido hace poco de Chile, decía que los vecinos de Valdivia y el Gobierno de aquella república tenían relaciones muy estrechas con los Araucanos y tribus que ocupan el territorio comprendido entre el Neuquén y Río Negro; que tienen un comercio muy activo de ganado, todo el que consume el Sud de Chile. Que no tiene duda de que el Gobierno Chileno armará e instruirá en la guerra a esas tribus, tal vez mandando soldados, para batir a la división argentina que vaya a ocupar esas comarcas. Que es cuestión de vida para el Sud de Chile sostener ese comercio de ganado barato, robando en nuestras estancias; que les faltará la carne el día que lo pierdan" (Luis F. Aráoz a J. A. Roca, Tucumán, 13-XI-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6).

<sup>8113</sup> Diversos autores (Woodward, 1965 y 1996; y Gudmundson, 1982), probaron que en la América Central la división de la oligarquía fué ideológica, pues los conservadores fueron percibidos como representantes de los intereses clericales y mercantiles, mientras que los liberales fueron tradicionalmente vistos como pertenecientes a grupos terratenientes criollos deseosos de imprimir a la economía un modelo de comercio libre y de expansión agro-exportadora. Sin embargo, en el caso de la Venezuela decimonónica, Safford (1974) sostiene que se dió un modelo político opuesto al generalizado por Woodward. En cambio, en el Perú, para Burga y Flores Galindo (1984), y en Bolivia, para Calderón y Laserna (1983), la división fué geográfica, pues las oligarquías no tuvieron la voluntad de elaborar un "proyecto nacional" (Bourricaud, 1966, 26; y Burga y Flores Galindo, 1984, 90).

<sup>8114</sup> Thompson y Zuk, 1982, 623. A los críticos que afirmaban que sus ciclos reflejaban fuerzas exógenas, Kondratiev replicó que la guerra no podía ser considerada exógena a la construcción del sistema capitalista mundial (Rostow, 1975, 720).

<sup>8115</sup> Acerca de la noción de caudillismo, implementada en el modelo de Lynch (1987) para explicar el rosismo, ver Wolf y Hansen, 1967; y Halperin Donghi, 1989.

<sup>8116</sup> Acerca de la noción de populismo para explicar el Yrigoyenismo, ver Tamarin, 1980). Sobre la noción de asincronía, utilizada en el modelo de Germani (1978) para explicar el peronismo, ver De Ipola, 1989, 336; citado por Neiburg, 1994, 543, nota 34.

<sup>8117</sup> Cardoso (1973a), fundado en Goblot (1969), sostuvo que la diversa intensidad de los vestigios, supervivencias o reminiscencias obedeció al desigual desarrollo del capitalismo, y específicamente al carácter limitado del proceso de cambio de que resultó el advenimiento del capitalismo periférico (Cardoso, 1973a,

---

101). Para Ouellet (1981) el tema de la supervivencia, vehiculizada por la Escuela nacionalista tradicional, no tiene sentido sino en relación con la imagen de una comunidad nacional pre-existente profundamente refractaria a toda idea de clases (Ouellet, 1981, 407). Halperín Donghi (1972) se pregunta si las supervivencias en la América Latina son el fruto del arcaísmo cultural de las áreas antes marginadas al poder central (Halperín Donghi, 1972, 381). Filippi (1988) y von Mentz (1992) confirman la persistencia de la modernidad colonial-absolutista en la América Latina decimonónica (Filippi, 1988, 93, 97, 235; y Mentz, 1992, 539). Estas persistencias o sobrevivencias han sido visualizadas por Filippi (1988) como un bloqueo de los procesos de desfeudalización, o más aún como una refeudalización o extensión y profundización de las relaciones de asimetría y asincronía, que habían sido generadas por la combinación de los llamados "efectos de fusión" con los de "causalidad exterior" (Filippi, 1988, 184 y 185). Mayer (1981, 1984) extiende la persistencia de la modernidad absolutista en Europa hasta la caída del Imperio Otomano con la Paz de Versalles (1914), y Castañeda (1993) la prolonga para el caso de América Latina hasta fines de este milenio (Castañeda, 1993, 306). Para Vattimo (1994), fundado en Guidieri (1980), el mundo contemporáneo no occidental es como un museo o yacimiento arqueológico o "un inmenso depósito de supervivencias" (Vattimo, 1994, 140-144). Recientemente, Visvanathan (1989) discute la tendencia a leer la historia de la India contemporánea en términos de carencias, ausencia o incompletud, lo cual se traduce en inadecuación (citado en Chakrabarty, 1992, 5). Debo esta última referencia a la gentileza de mi colega de la Universidad de Ohio, Prof. Leslie J. Frazier, quien investigó la matanza de Santa María de Iquique (Chile). La noción de incompletud debe provenir del teorema lógico-matemático de Kurt Gödel.

<sup>8118</sup> las revoluciones de 1874, 1880, 1890, 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976.

<sup>8119</sup> Sommariva, 1929, I, 440.

<sup>8120</sup> Diario de Sesiones de la Sala de Representantes, Sesión del 7-III-1854, 24a. Sesión Ordinaria, p.41; citada en Ornstein, 1946, 363).

<sup>8121</sup> Sánchez Viamonte, 1946, 111.

<sup>8122</sup> cuñado del Coronel Segundo Roca Tejerina.

<sup>8123</sup> dicho fallo rezaba "...por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía" (Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50).

<sup>8124</sup> con motivo de un discurso en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 6 de Septiembre de 1886. Calvo se había desempeñado en Europa a sueldo del Mariscal López y su periódico La Reforma Pacífica era subsidiado por López (Rebaudi, 1924, 186).

<sup>8125</sup> Nicolas A. Calvo a J. A. Roca, Buenos Aires, 7-IX-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.54. Es muy probable que Calvo haya influido sobre el pensamiento de Joaquín V. González, por cuanto las ideas expresadas en esta ignorada carta se hallan reproducidas en términos muy semejantes en los conceptos que su hijo Julio V. González le transmitiera a Carlos Sánchez Viamonte (Sánchez Viamonte, 1957b, 375).

<sup>8126</sup> Nicolas A. Calvo a J. A. Roca, Buenos Aires, 7-IX-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.54.

<sup>8127</sup> en el debate acerca de la intervención a Salta, acontecido en 1877.

<sup>8128</sup> Senador Nacional Aristóbulo del Valle, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 17-V-1877, p.46.

<sup>8129</sup> Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, p.90.

<sup>8130</sup> MacIntyre, 1987, 227. Contrariando las tesis de Félix de Azara e influido por la lectura de la obra del mexicano Lucas Alamán, Mitre (1859) cree descubrir la idea de la nación preexistente en la existencia del criollo, incurriendo para ello en un reduccionismo esencialista o binario, al recurrir a la vieja teoría de la lucha de razas, sosteniendo que la revolución americana fue no sólo una insurrección de las colonias contra su metrópoli, "...sino principalmente de la raza criolla [mestiza] contra la raza española" (Mitre, 1971, III,

capítulo XXIX, 4). Al coaligarse el criollo con el indígena, "...hacía suyos sus antiguos agravios,...[y] renegaba de la sangre española que corría por sus venas" (Ibíd.). Para la misma época, y seguramente prendado por la lectura de Thiers, Mitre viró nuevamente de un reduccionismo étnico a otro economicista o clasista, al insistir que el origen de las nacionalidades y del conflicto entre criollos y peninsulares se debía tanto a las luchas contra las trabas económicas para la libertad del comercio, como a la desarticulación del comercio monopólico y el paulatino colapso de la burocracia colonial. Posteriormente, Mitre (1887) destacó el argumento que Paz Soldán (1868-74) había tomado de una carta que Félix Durán le había escrito a Tomás Guido acerca de la impotencia del Perú para colaborar con la redención Americana. A diferencia de Chile y del Río de la Plata, donde según Mitre, fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana (1854-58), el mestizaje había engendrado una raza criolla; en el Perú, Durán atribuía la necesidad de una fuerza extraña para su redención a "...la abundancia de castas india y etiópica y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes entre los americanos blancos y los indios" (M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz Soldán, 1868-74, I, 27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389).

<sup>8131</sup> Matienzo, 1910, 267.

<sup>8132</sup> sobrino carnal del Gobernador José Tomás Toledo Castellanos (GP.1831).

<sup>8133</sup> hijo del sanjuanino Tadeo Rojo y Maurín y de Gertrudis Frías y Mallea (Cutolo, VI, 349). Su mujer Dámasa de Alvarado Poveda, hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda Isasmendi, era prima del que luego fuera el Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", sobrina del Gral. Rudecindo Alvarado y pariente de José María Todd (h) (Fernández Lalanne, 1989, 77).

<sup>8134</sup> hijo de José de Uriburu Bazterrechea y de Manuela Gonsález de Hoyos; hermano de los Gobernadores Evaristo, Vicente y Pedro Uriburu; padre del ex-Rochista Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-1901); suegro del Senador Nacional Federico Ibaguren Díaz Niño (SN.1871-80); tío del Gobernador José Uriburu Poveda (GP.1864), y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907); y primo hermano del Gobernador Mariano Gordaliza y Hoyos (GP.1810).

<sup>8135</sup> Los federales, en tanto, tras ensayar una frustrada guerra ofensiva, comienzan a improvisar en todo el interior una guerra de desgaste o de posición. A mediados de 1864 triunfan en las elecciones de la Legislatura Salteña en alianza con liberales disidentes. En 1866 se sublevan exitosamente en Mendoza.

<sup>8136</sup> Transcripción del periódico La Actualidad, de Salta, El Liberal de Tucumán publicó en 1864 un artículo titulado "El partido Liberal de Salta", donde se decía que: "...Los antiguos y honrados unitarios, los viejos y jóvenes que arrostraron el ostracismo de Rosas, mientras los Uriburu subían y bajaban las gradas del solio del tirano todos esos hombres que abstenían de tener por compañeros o socios políticos a los Uriburu, hoy forman en las filas de su antiguo partido, desde el momento que los sempiternos cortejos de toda tiranía han sido separados de la escena pública por el brazo poderoso que defiende sus derechos" (*El Liberal*, Domingo 26-VI-1864, n.253).

<sup>8137</sup> Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92.

<sup>8138</sup> La Actualidad (Salta), repr. en El Liberal (Tucumán), 30-VI-1864, n.254.

<sup>8139</sup> en un Manifiesto firmado por Pedro José Frías, (a) "Peque", Martín V. Cornejo, Alejandro Figueroa, el Coronel Francisco Zenteno, y otros, se repudiaba el hecho de que una familia Salteña (los Uriburu) se aprovechara de la victoria de Pavón para alcanzar el monopolio de la función pública asegurando una renta de \$20.000 anuales a hermanos, primos y sobrinos (Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92).

<sup>8140</sup> Convencional Constituyente en 1855, Fiscal en 1857, Diputado Provincial en 1864, Vice-Presidente 1o. de la Legislatura de Salta en la Gobernación de Cleto Aguirre, Camarista en 1865, frustrado Diputado Nacional en 1866 y Ministro del Gobierno de Sixto Ovejero en 1867. Era hijo del Coronel Gaspar López y de Josefa Plaza; yerno del Jefe del 8o. Regimiento de Línea Coronel Diego Wellesley Wilde; marido de Pastora Mercedes Wilde (hermana mayor del luego Ministro de Instrucción Pública de la Nación Eduardo Wilde); primo hermano político del tucumano Juez Federal Próspero García; y suegro del jurista salteño José María Solá (Cornejo, 1983, 119-120).

<sup>8141</sup> fundado en 1860 (Galván Moreno, 1944, 397).

---

<sup>8142</sup> fundado en 1865 (Galván Moreno, 1944, 397). Lamentablemente la colección de este afamado periódico, que existiera en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, ha desaparecido por la incuria de las autoridades responsables de su salvaguarda.

<sup>8143</sup> En mayo de 1873, en oportunidad de la sucesión del Gobernador Delfín Leguizamón Cobo, el Coronel Napoleón Uriburu le transmitía a Julio A. Roca que si aquél "...quiere imponer a la Honorable Legislatura, a requisición de la mayoría, haré respetar el sagrado recinto" (Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Jujuy, 13-V-1873, AGN, Archivo Roca, Leg.1, fs.654, Doc.248). Y si

"...quiere hacer él mismo [Delfín] la revolución para que se quede ejerciendo el ejecutivo su [medio] hermano Juan Martín [Leguizamón Goicoechea], tendrán que matarlo sus propios partidarios a Don Delfín, pues de otro modo lo repondré para que se haga la elección" (Ibídem).

<sup>8144</sup> El inconveniente fue, según Isidoro López Plaza, que para esos días, reunido los contingentes de milicias, los gauchos que las integraban, acostumbrados a eludir la leva, "...lo que menos querían era que los apunten para cosa alguna" (Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8145</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. El Gobierno Nacional había reprobado la ejecución de Angel Vicente Peñaloza "ordenada después de su captura", pues nada habrá "...debido ni podido ejercer sobre él las atribuciones y prerrogativas de los Tribunales y del Jefe Supremo del Estado", mandando insertar el 26-XI "esta Resolución en la Orden General del Ejército" (Argentina, Ministerio de Guerra y Marina, Memoria, año 1864, Anexo A, pp.48-52; citado en Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, II, 164).

<sup>8146</sup> nacido en Inglaterra, vino cuando niño junto a su padre Santiago Spencer Wilde, siendo ahijado del Duque de Wellington. Peleó en Ituzaingo a las órdenes del Coronel Brandsen; en La Tablada y Oncativo a las órdenes del Gral. Paz; y en la Ciudadela a las órdenes del Gral. Lamadrid. Estuvo en Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí y Yataití Corá. Fue marido de la Tucumana Visitación García, hermana de Fortunata García, aquella que rescató de la pica la cabeza del Mártir de Metán; y medio hermano del escritor José Antonio Wilde (Cutolo, VII, 727).

<sup>8147</sup> D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8148</sup> D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8149</sup> D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8150</sup> D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8151</sup> D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8152</sup> hijo del Coronel D. W. Wilde; y hermano de Eduardo Wilde.

<sup>8153</sup> *El Liberal* (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>8154</sup> *El Liberal* (Tucumán), 29-V-1864, n.245.

<sup>8155</sup> *El Liberal* (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>8156</sup> entre ellos se hallaban los provenientes de Córdoba Fernando Allende y José Achával.

<sup>8157</sup> nacido en 1818, Diputado Provincial, y Senador Nacional (1873-77). Era yerno del Gobernador de Tucumán Celedonio Gutiérrez y sobrino del Dr. José Eusebio Colombres, fundador de la industria azucarera del Tucumán.

---

<sup>8158</sup> *El Liberal* (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>8159</sup> primo hermano del Gobernador y Diputado Nacional Teófilo Sánchez de Bustamante Tezanos Pintos (DN.1854-68) (GP.1873-74); y primo hermano político del Gobernador Martín Torino Santibáñez (GP.1878).

<sup>8160</sup> Anselmo Rojo a Wenceslao Paunero, Tucumán, 5-IV-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2629).

<sup>8161</sup> "...a instigación de su yerno Isidoro López hace sublevar al 8o., olvidando ese miserable que debía el honor de mandar esa fuerza, al mismo a quien hacía traición, olvidando que ese Gobierno a quien quería derrocar era el mismo que le había facilitado los recursos necesarios para la formación del cuerpo que mandaba y olvidando por fin el objeto con que fué creado el Batallón 8o. de línea" ("Revolución sofocada", *El Liberal*, 14-IV-1864, n.232).

<sup>8162</sup> *El Liberal* (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>8163</sup> partidarios del Vice-presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui en su lucha con el Gobernador del Estado de Buenos Aires Gral. Bartolomé Mitre.

<sup>8164</sup> Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Debo esta información a la amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gay.

<sup>8165</sup> integrado por los Uriburu y sus aliados los Valdéz, los Leguizamón y los Zuviría (Fernández Lalanne, 1989, 94).

<sup>8166</sup> José Posse a Julio A.Roca, Tucumán, 5-X-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8).

<sup>8167</sup> cuñado del Procurador Fiscal Arístides López Gasteaburu (PF.1874).

<sup>8168</sup> Hijo del asesinado Brigadier Pablo Latorre y de Petrona Sierra, marido de Lorenza Arias de la Corte, y padre del Diputado Nacional Aniceto Latorre, marido de Carmen Güemes Castro (Cutolo, IV, 119).

<sup>8169</sup> hijo de Pedro José Frías y Castellanos y de Loreto Sánchez de Peón y Avila, casado con Pía Pérez, hermano del Tte. Gral. Eustoquio Frías, y padre del que fuera Gobernador de Salta entre 1890 y 1893, Coronel Pedro José Frías.

<sup>8170</sup> Comandante General de las Tropas Nacionales. Nacido en Tarija en 1826, con actuación en las tropas Bolivianas. En Julio de 1861 ofreció su adhesión al Gobernador de Salta Gral. Anselmo Rojo insinuando que con tropas que levantaría el Coronel José Manuel Sosa en los Valles Calchaquíes, defendería a Rojo. Era hijo de José Félix Fernández Cornejo y Ruiz y de Clara López; marido de Eduviges Alemán Tamayo; y hermano de Escipión y Rosenberg Cornejo. Era asimismo cuñado del Dr. Nicolás Carenzo, Gobernador de Salta en 1849; y tío del Senador Nacional y Ministro de Hacienda de la Nación Francisco J. Ortiz Alemán.

<sup>8171</sup> Dueño de la finca San Agustín, hijo de Agustín Centeno y Carmen Santos de León, casado en 1840 con María Inés Alemán y Puch, hija de Manuel Alemán y Arce y de Juana Puch (Centeno, 1929, II, 29-49). El Coronel Francisco Centeno era tío político del Diputado Provincial Francisco J. Alsina. Su hijo homónimo es el autor de *Virutas Históricas*.

<sup>8172</sup> hijo de Narciso Figueroa y Toledo Pimentel y de Gabriela Goyechea Cornejo, y casado en primeras nupcias con Mercedes Aráoz, y en segundas nupcias con su sobrina Benita López Cornejo.

<sup>8173</sup> hijo de Inocencio Torino Sánchez y de Gabriela Santibáñez Bárcena, y casado con una Solá.

<sup>8174</sup> hijo del Coronel Manuel Solá Tineo y de Josefa Chavarría Moldes, y casado con Julia Terán Silva (Calvo, II, 309).

<sup>8175</sup> Rudecindo y Casimiro Argañaraz, célebres por la saña criminal con la cual habían perseguido en el pasado a los Unitarios.

---

<sup>8176</sup> Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634).

<sup>8177</sup> *El Liberal* (Tucumán), 14-VII-1864, n.258.

<sup>8178</sup> hijo de José Camilo Aguirre y de Francisca Ignacia Aguirre y Luján; sobrino carnal del Gobernador Juan Manuel Aguirre; marido de Edelmira Zambrano Echazú; y primo hermano del Dr. Emilio Echazú Aguirre (Calvo, III, 30-31; Cornejo, 1970, 236; y Cutolo, I, 45).

<sup>8179</sup> Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Debo esta información a la amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gay. Ver también Noble, 1960, 125-126.

<sup>8180</sup> Anselmo Rojo a Wenceslao Paunero, Santiago del Estero, 24-V-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2632). Debo esta información a la amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gray.

<sup>8181</sup> El Liberal (Tucumán), 14-VII-1864, n.258.

<sup>8182</sup> cuñado del Comandante Martín Ugolino Cornejo.

<sup>8183</sup> El Liberal (Tucumán), 25-VIII-1864, n.270.

<sup>8184</sup> hijo del Gobernador Evaristo Uriburu y Hoyos; hermano del Presidente José Evaristo Uriburu; sobrino carnal de los Gobernadores Vicente Uriburu y Hoyos (GP.1831), Pedro Uriburu y Hoyos (GP.1850), y Juan Nepomuceno Uriburu y Hoyos (GP.1861); y primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (Formosa, 1900), del Diputado Nacional Dr. Pedro José Uriburu Arias (DN/Tucumán, 1874), del Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-1901), y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907).

<sup>8185</sup> Bruno, 1967, XI, Sección II, Cap.I-IV.

<sup>8186</sup> hijo de Pedro Molina y de Manuela Videla, sobrino de Eugenio Corvalán, y tío de Francisco Civit. Es indudable que los Molina provienen de la elite colonial, aunque no he podido determinar si Luis Molina descende del Lic. Manuel Ignacio de Molina, Alcalde en 1796, o de Miguel de Molina Chacón.

<sup>8187</sup> hijo de Nicolás Villanueva, quien había defendido a Mendoza contra las fuerzas del Fraile Aldao y de Facundo Quiroga luego de la batalla de Los Barriales.

<sup>8188</sup> Funes, 1942, I, 49; citado en Martínez, 1979, 106 y 108. Así, los Villanueva se emparentaron con los Galigniana, los Pelliza, y los García; los González con los Marcó, los Videla, y los Correas; los Arroyo con los Godoy; los Bombal con los Videla; los Civit con los Corvalán y los Benegas; y los Blanco con los Zapata y los Benegas (Masini Calderón, 1967, 209).

<sup>8189</sup> cuñado del Diputado Nacional Baltazar Sánchez Echegaray, (DN.1854-58); y suegro del Diputado Provincial Fermín Correa Barros (DP/SV.1875).

<sup>8190</sup> *La Opinión Pública* (Córdoba), Domingo 1-II-1863, año II, n.30.

<sup>8191</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 30-V-1877, p.116.

<sup>8192</sup> Noble, 1960, 132.

<sup>8193</sup> cuñado del Gobernador Zacarías A. Yanzi y primo hermano por vía materna del Gobernador José M. E. Quiroga Sarmiento (GP, 1841).

<sup>8194</sup> pariente político del Gobernador Manuel Gómez Rufino.

<sup>8195</sup> *El Nacional*, 13-VIII-1864 (procedente de un suelto de *El Constitucional* de Mendoza).

<sup>8196</sup> marido de Austina Díaz de la Peña, hija de Salvador Díaz de la Peña y de Francisca X. Ramírez (Vilgré

---

La Madrid, 1977, 306).

<sup>8197</sup> concuñado de los Gobernadores José Luis Cano Valdés (GP.1840); y Pedro José Segura Cubas (GP.1852); y primo hermano y concuñado del Gobernador Correa Bulacio, Ramón Rosa (GP.1862).

<sup>8198</sup> Heras, 1960-66, 291ss; y Pereyra, 1960-66, 302-04; citado por Cutolo, V, 167.

<sup>8199</sup> Cairolí, 1964, 174.

<sup>8200</sup> hijo del Capitán de Milicias Ramón Antonio Correa y de Rosalía Bulacios, marido de Neófita Augier y Correa, concuñado de los Gobernadores Pedro José Segura Cubas (GP.1852), y José Luis Cano Valdés (GP.1840), primo y concuñado del Gobernador Luis José Lobo Bulacio (GP.1862), y tío político del Gobernador Ramón Recalde (Gob.1867).

<sup>8201</sup> Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151.

<sup>8202</sup> hija de Pedro Ares, español, y de Trinidad Díaz de la Peña; y mujer de Domingo Vildoza (Sosa de Newton, 1980, 26). Doña Trinidad debe haber sido hija de Marcelo Antonio Díaz de la Peña, y de Josefa Figueroa Ceballos; nieta de Salvador Díaz de la Peña, y de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San Felipe, Chile; y sobrina de Agustina Díaz de la Peña, mujer de Miguel Molina; y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el General Luis José Díaz de la Peña, tío de Don Salvador, mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá. Así Santa Bárbara, alias La Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a su sobrina Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306). El Alcalde de primer voto Luis José Díaz de la Peña, Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, Andalgalá. Pretendía que la Real Hacienda le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un Colegio en el Valle de Catamarca (Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

<sup>8203</sup> Cutolo, V, 167.

<sup>8204</sup> Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151.

<sup>8205</sup> José M. del Campo acuerda con Próspero García que "...que la prensa de Santiago tiene la culpa de habernos provocado a una polémica que nunca la hubiéramos iniciado por honor al partido que pertenecemos. La causa principal es no haber contado con los votos de esta provincia para la Vice Presidencia" (José M. del Campo a Próspero García, Tucumán, 1-IX-1862, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12).

<sup>8206</sup> Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151.

<sup>8207</sup> hijo de José Lino Maubecín y de Rudecinda Aráoz, y cuñado del Gobernador Miguel Molina (GD.1865) (Sommariva, 1929, I, 244; Brunello, 1944, 15-29; y Cutolo, IV, 479).

<sup>8208</sup> exposición del Senador Angel Aurelio Navarro Segura (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151).

<sup>8209</sup> hijo del Senador Nacional Facundo Zuviría, y hermano de los Diputados Nacionales Ramón, Julio y Fenelón de Zuviría, representantes de Salta, San Luis y Córdoba respectivamente.

<sup>8210</sup> *La Opinión Pública* (Córdoba), Jueves 4-XII-1862, n.13.

<sup>8211</sup> *La Opinión Pública* (Córdoba), Miércoles 25-II-1863, año II, n.71. A renglón seguido refiere que: "...Uno de los motivos de vociferación de los corresponsales de El Litoral, es porque Cullen emplea hijos de otras provincias y no llama a su lado a Iriondo y otros de esta jaez". Las bancas nacionales que correspondían a provincias periféricas como Santa Fé no estaban disponibles para los miembros de sus propias oligarquías, por cuanto los gobiernos provinciales en acuerdo con el Gobierno Nacional las reservaba a los miembros de la oligarquía central denominados alquilones (Heras, 1959, p.XLVII).

---

<sup>8212</sup> cuñado de los Gobernadores Tomás Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1861); José María Cullen (GP.1855/56/67); y Patricio Cullen (GP.1862/63/64); conuñado del Rector de la Universidad de Buenos Aires Juan María Gutiérrez y abuelo del Diputado Nacional Nicasio Salas Oroño (DN/Córd. 1914-18).

<sup>8213</sup> hijo de Francisco Jaez de Rosas y de Luisa Escalada (Crespo Naón, 1983, 83).

<sup>8214</sup> Duarte, 1974, 77; y Bonaudo y Sonzogni, 1992, 96.

<sup>8215</sup> hijo de Francisco Xavier de Lagraña y de Rosalía de Acosta y Soto, marido de Florentina Cabral y Latorre y cuñado del Gobernador Juan Vicente Pampín y Goytía (GP.1875).

<sup>8216</sup> Domínguez, 1947, 70-72; y Castello, 1991, 420. Para más pormenores de esta gestión, en especial de la actuación de José Hernández, el autor del Martín Fierro, de su hermano Rafael y de sus cuñados González del Solar en la redacción del Eco de Corrientes y en los motivos del golpe que lo destituyó, ver Halperín Donghi, 1985b, 38 y 55-57.

<sup>8217</sup> Ver Buchbinder, 2004, 121.

<sup>8218</sup> Castello, 1991, 424.

<sup>8219</sup> ver Buchbinder, 2004, 32.

<sup>8220</sup> Hijo de José Antonio Román y Drugo, nacido en Aragón, y de María Mauricia de Allende y Moyano, y marido de Rosa Arredondo y de la Corte (Cutolo, VI, 373).

<sup>8221</sup> Cutolo, VI, 373; y Romero Carranza, et. al., II, 1171.

<sup>8222</sup> Sin relación de parentesco alguna con su Ministro Filemón Posse, que pertenecía a la familia del mismo apellido pero residente en Tucumán.

<sup>8223</sup> Peña, 1966, 490. De acuerdo a la versión del Gral. Wenceslao Paunero, la gestión de Justiniano Posse que incluía la de sus Ministros Saturnino Laspiur y Filemón Posse, fué

"...tan impopular y odiado en todas las clases sociales de la Provincia, como casi es imposible ponderarlo, pues que difícil sería encontrar un sólo ciudadano que no arroje sobre él los cargos más graves, y muy particularmente la revolución y atentados y vejaciones que han sido su consecuencia" (Taboada, 1933, 221).

<sup>8224</sup> el mismo que luego participó del asesinato del Gral. Urquiza. Ver Frías, 1964-65.

<sup>8225</sup> Frías, 1964-65; y Peña, 1966, 499.

<sup>8226</sup> Peña, 1966, 504.

<sup>8227</sup> Noble, 1960, 126-131.

<sup>8228</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 30-V-1877, p.104; Peña, 1966, 510; y Terzaga, 1968.

<sup>8229</sup> Era hijo de Juan Estéban Peñaloza y de Ursula Riveros; y nieto de Don Nicolás de Peñaloza y Bazán, y de Melchora Agüero y Bazán. Su abuelo Don Nicolás fue Alcalde del Partido de Los Llanos, y dueño tanto de una estancia en Atilas y otra en Malanzán como de una acentuada conciencia de su alcurnia o estirpe, al extremo de provocar en la década de 1770 célebres litigios en perjuicio de paisanos y de parientes directos suyos, tales como el Alcalde de Hermandad Francisco de Vera y Bustamante, José Antonio Medina, y su propio hijo Juan Estéban Peñaloza y la que luego fuera su nuera Ursula Riveros, padres del Chacho. El derecho de los padres a seleccionar el marido de sus hijas e hijos era más que nada un mecanismo de defensa contra el descenso social que el matrimonio con criollos bastardos y étnicamente impuros significaba. Aquellos miembros de la elite que no se resignaban a una desigualdad étnica y social y se negaban a entregar sus hijas a un convento, se veían a veces con la ingrata sorpresa de tener que afrontar las consecuencias de

---

una relación espuria. La actitud de Peñaloza hacia Francisco Vera y Bustamante, aspirante a casarse con su hija respondería a que seguramente aspiraba para su hija un pretendiente que fuere o bien un funcionario o comerciante español o un criollo rico y de hidalgo linaje, es decir libre de impurezas raciales que pudieran contaminar su prosapia. Pero no sólo aspiraba un matrimonio conveniente para su hija mujer sino también para su hijo varón. En 1796, veinte años después del incidente con Vera y Bustamante, uno de los hijos varones de Francisco Peñaloza, Juan Estéban, hermano menor de la niña cortejada por Vera, se casa con Ursula Riveros (padres luego del caudillo Angel Vicente Peñaloza, alias "El Chacho"). Indignado por la elección hecha por su hijo, Don Nicolás le inicia con la ayuda de su hermano el Presbítero Dr. Vicente Peñaloza, un juicio de disenso contra dicho matrimonio, aduciendo el parentesco existente entre los contrayentes y la inconducta moral de la novia, al mismo tiempo que acusaba al párroco de haberlos casado sin su autorización. Era una época en la que la ausencia del consentimiento paterno significaba la pérdida de los derechos hereditarios (Ots, 1934, 121).

<sup>8230</sup> Reyes (1916) cuenta que Villafañe "...se escondió en la Iglesia Matriz detrás de un santo; mientras estaba escondido, resultó que el poncho que tenía le estaba pareciendo por bajo del hábito del santo; su hija Restituta, que estaba allí como todas las mujeres de la ciudad que tuvieron tiempo de guarecerse, le dijo textual: "...tatita, póngase bien que le está pareciendo el poncho" (Reyes, 1916, 48). No obstante la cobardía del Gobernador, Reyes insiste que los conceptos deshonrosos de la conducta de la elite Riojana durante el sitio, vertidos por el Gral. Rivas en una carta dirigida a Mitre, faltan a la verdad. Rivas le otorgaba todo el crédito de la defensa al 6 de Línea y a sus Jefes y oficiales, Gral. Arredondo, Ayudante Manuel Morillo y Teniente Liborio Bernal (suegro del Gral. Agustín P. Justo), y alegaba, sin haber sido testigo del sitio, que en La Rioja "...no había habitantes que tuvieran nociones siquiera de instituciones y de la causa de la libertad que esas fuerzas nacionales nos traían aquí por primera vez" (Reyes, 1916, 30). Para desmentir el infundio, Reyes transcribe de la obra de su padre Marcelino Reyes, y del testimonio de Dámaso A. Mendoza, un par de listas de los ciudadanos que tomaron un fusil para defender sus hogares (Reyes, 1916, 43 y 118-119).

<sup>8231</sup> J. D. Villanueva a J. Roca, Córdoba, 20-I-1883 (AFN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). Yaben (1938) afirma que fué hecho Gobernador por unanimidad en la Cámara Legislativa y el Colegio Electoral (Yaben, 1938, II, 692-698). Ver también Archivo del General Mitre (1911), t.VI, 189; y t.XI, 60-61, citado en Cutolo, II, 85. Lo acompañó como Ministro de Gobierno Guillermo San Román Dávila.

<sup>8232</sup> Reyes (1916) relata que los ciudadanos voluntarios en el Sitio de La Rioja fueron, con pocas excepciones, "...de la clase decente que moraba en esta ciudad en ese tiempo, pues la gente del pueblo estaba en masa con la montonera con raras excepciones, también, o eran la montonera misma unida a los foragidos de Los Llanos y laguneros con que luchábamos" (Reyes, 1916, 90). Asimismo Reyes describe como fueron las cargas de la Montonera en el sitio de 1862: "...Las caballerías nos disparaban sus armas tendidos sus jinetes a la costilla del caballo, para no presentar su blanco a nuestros fuegos, de donde resultó que más caían caballos que hombres. Hasta muchos días después se hallaron muchos caballos en los campos próximos y lejanos de esta ciudad y por lo regular casi todos heridos en las piernas y asentaderas, lo que se explicaba por la posición que llevaban en el caballo al atacar y volver cara cediendo a nuestros fuegos que era recio por demás" (Reyes, 1916, 83). Para una versión revisionista, ver Paoli y Mercado (1973).

<sup>8233</sup> J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8234</sup> J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8235</sup> J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8236</sup> J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>8237</sup> Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988.

<sup>8238</sup> legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y provinciales.

---

<sup>8239</sup> Auza, 1971, 116.

<sup>8240</sup> Para la intervención Argentina en la Banda Oriental durante el período Rosista y la llamada Guerra Grande, ver Quesada, 1994; durante la década del 50, en el desembarco del Gral. César Díaz y en la llamada Hecatombe de Quinteros, y durante la década del 60, en la llamada Cruzada Libertadora, prolongación de la Guerra Grande, ver Lockhart, 1976, Cap. VI; durante la década del 70, en la llamada Revolución de las Lanzas, ver Reula, 1963-69, 27-34; y Vidaurreta, 1967, 403; para su intromisión en la década del 80, en la que se dio en denominar la Revolución del Quebracho (1886), contra el Dictador Máximo Santos, que encabezaran los Generales José Miguel Arredondo y Enrique Castro, ver Caillet-Bois y Annecou, 1968; Vidaurreta, 1983; Aguirre Ramírez, 1989; y Rato de Sambucetti, 1995; y para su influencia en la Revolución del 97 y el 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; Ponce de León, 1956, 1978; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; y Chasteen (1995). Para la participación Argentina en la Guerra del Pacífico, y sus vinculaciones con Bolivia, ver Yrigoyen (1921); Bonilla (1979); y Vidaurreta (1988). En Paraguay, los partidos políticos surgidos después de la Guerra de la Triple Alianza tuvieron su origen en la Legión Paraguaya, contingente de Paraguayos que acompañó a los Ejércitos aliados (Caballero Aquino, 1985, 46; y Lewis, 1992). Más luego, la candidatura presidencial del intelectual y Ministro de Relaciones Exteriores José Segundo Decoud --uno de los integrantes de la Legión Paraguaya y conculado del Presidente Juan G. González-- fué apoyada por la dirigencia argentina y boicoteada por el Ministro Brasileño Dr. Amadeo Cavalcanti (Caballero Aquino, 1985, 181). Decoud fué acusado en las sesiones de la Cámara de Diputados de 1891 de anexionista o de veleidades argentinistas (Domínguez, 1959, 67-127; y Caballero Aquino, 1985, 197). La dirigencia argentina había apoyado la revuelta de Cándido Bareiro y Bernardino Caballero contra el Presidente Benigno Ferreira (Caballero Aquino, 1985, 50). Acerca de las hipótesis para explicar la Guerra de la Triple Alianza, ver Box (1958) y Abente (1987). Debo esta última referencia a la generosidad de la Dra. Alicia Vidaurreta. En cuanto al crimen del Presidente Juan Bautista Gill, caracterizado como pro-Brasileño y anti-Argentino, Nicanor Godoy le confiesa a Benito Cook que "...Es cierto que fui uno de los que dirigió aquellos sucesos y confieso que tengo orgullo de haber conspirado en obra tan salvadora...Me dirá Vd. que aquello debe y es reprobado por la civilización. Es cierto. Pero si alguno hubiere escuchado los gemidos de las víctimas de aquel tirano [Gral. Germán Serrano y sus acompañantes] y visto enlodar la delicadeza de los hombres más distinguidos y espuestos al mas vil ultraje de nuestros hogares y nuestras familias yo preguntaría si hombres jóvenes como nosotros enseñados para la libertad en tierra argentina, yo pregunto repito si debíamos ser perdonados a fuerza de egoístas y permanecer impasibles y sin corazón ante el cuadro de las iniquidades de aquel mandatario tan ilegal si se quiere, pero justamente castigado por la voluntad popular de la que fuimos intérpretes" (Nicanor Godoy a Benito Cook, Rosario, 14-VII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 46).

<sup>8241</sup> Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977, 1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y Cragnolino, 1986-87.

<sup>8242</sup> Sagarna, 1943; Spalding, 1972; y Argacha, 1979; y Saguier, 1996a.

<sup>8243</sup> permítaseme citar a Saguier (1995f). Para el Diputado Nacional por Córdoba Ramón T. Figueroa, en su réplica de 1892 al Diputado Gonnet, aclaraba que los delitos de sedición y rebelión no eran --tanto para el art. 6 de la Constitución Nacional, la Ley de Justicia Federal de 1863, y el Código Penal-- el mismo objeto. El Código Penal, para Figueroa, "...se ocupa de clasificar los delitos de rebelión y de sedición con relación exclusivamente a las autoridades provinciales; casos de rebelión y de sedición que no están legislados en la Ley de 1863, la que se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a los poderes públicos del orden federal...Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituida. La sedición no importa el desconocimiento de la autoridad constituida, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades de las provincias, porque según el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar general del país, porque deben afectar solamente la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la provincia donde esos disturbios se hayan producido" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello, sacaba el Diputado Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, en el juicio que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero común radicados en la misma provincia donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89).

---

<sup>8244</sup> García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d.

<sup>8245</sup> permítaseme citar a Saguier, 1996b.

<sup>8246</sup> ver Levaggi (1991) y Saguier (1994).

<sup>8247</sup> ver Levaggi (1992) y Saguier (1995a) y (1995b).

<sup>8248</sup> Little, 1980 y 1985.

<sup>8249</sup> entre otros, los de Masiello (1981); Calello, et. al. (1987); Pion-Berlin (1989); y Corradi, et. al. (1992).

<sup>8250</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 32.

<sup>8251</sup> donde un tercer actor (el gobierno federal) está colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes.

<sup>8252</sup> El ciclo comprendido entre 1885 y 1892 "...comienza en el segundo semestre de 1885, y alcanza su culminación en el segundo semestre de 1892, con los primeros signos de la recuperación" (Di Tella y Zymelman, 1973, 32).

<sup>8253</sup> El ex-Gobernador Rufino Ortega se había hecho conceder un inmenso latifundio en Malargüe, al sur de Mendoza. En carta a Roca, el ex-Gobernador liberal Francisco Civit recordaba con nostalgia que "...los viejos aseguran que sus tiempos eran mejores, que no había teatros, ni conciertos corruptores de la moral, que los bailecitos eran muy lindos con velas de candil y panales, que no se perseguía a los santos sacerdotes y que la carne valía entonces tres reales la arroba, en vez de tres pesos que cuesta hoy" (Francisco Civit a J. Roca, Mendoza, 1-X-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33). Bajo las órdenes de los Gobernadores de Roca, se hicieron según Posse "...aparatos de votaciones excluyendo opositores, encarcelando, persiguiendo o amenazándolos con las culatas de los remington para alejarlos de las mesas" (José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Ahora, decía Posse en Febrero de 1886, a dos meses de las elecciones de Abril, "...no hablemos de Juárez, que es para mí un muñeco político con entrañas de acerrín, no es él quien ha triunfado es Roca con sus sistema de fuerza" (José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Posse, en un raptó de voluntarismo político, concluía que no se podrá fundar gobierno regular según nuestras aspiraciones y nuestros deseos,

"...sino barriendo el suelo, triunfando con la lucha sobre la lucha, deshaciendo hasta los cimientos la obra de este soldado brutal que corrompió hombres e ideas para fundar el poder más cínico y corrupto de la que se recuerden en la historia de las repúblicas sud-americanas" (José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>8254</sup> cuñado de José María Herrera (Jefe de Policía, 1884).

<sup>8255</sup> "...El Enganche tiene 60 hombres de Línea y en el Cabildo hay 150 y de noche llevan 100 mas" (Luis G. Pinto a M. Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>8256</sup> hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse, hermano carnal de Pepe Posse.

<sup>8257</sup> Rojas le manifestaba a Roca que "...no necesito ni tengo objeto en hacerme pesado para él, lo he dejado en completa libertad de gobernar, limitándome a observarle de la manera más prudente y amistosa, cuando he creído que debía hacerlo para defender los intereses o las conveniencias del partido, sin haber recibido tampoco de él jamás ni la más leve manifestación de desagrado o fastidio" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>8258</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 12-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca,

---

Leg.37; y Rafael, 1982, 63.

<sup>8259</sup> En su camino a Santiago del Estero, Luis G. Pinto le manifestaba a Juárez Celman, que Gerónimo Ferreyra, cuñado de Silva, había sido apresado, y que encontraba "...una atmósfera muy pesada contra Silva, pues que ha venido completamente hebrio peleándose con los cantineros y cometiendo todo género de tropelías, y, como Vd. comprende todo esto contribuye a desprestigiar el Gobierno" (Luis G. Pinto a M. Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>8260</sup> Rafael, 1982, 65; y Achával, 1988, 373. Tal fué la tensión política pre-electoral, que con motivo de la llegada del Dr. José María Corvalán, y de una comida Rochista que se dió un Domingo de Julio de 1885 en el Salón del Club Social, "...recrudescieron las alarmas de la gente del gobierno", haciendo que el Gobernador, el Ministro y demás "...se encastillaron en el Cabildo, acuartelando la tropa" (Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Estación Frías, VII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>8261</sup> Rafael, 1982, 71.

<sup>8262</sup> Rafael, 1982, cap. VIII.

<sup>8263</sup> Bazán, 1992, 227.

<sup>8264</sup> régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

<sup>8265</sup> Sommi, 1957, 95; Noble, 1960, 384; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 212. El defensor de Olmos en el juicio político entablado en la Legislatura de Córdoba fue Lucio V. López (Frías, 1985, 232). En Córdoba, Marcos Juárez fué al Gobernador Olmos, lo que en Corrientes el Coronel Rudecindo Roca había sido en 1881 al Gobernador Gallino.

<sup>8266</sup> impuesto en la fórmula por Marcos Juárez.

<sup>8267</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 78. Hijo de Marcos Juárez y Luque y de Rosario Celman y Argüello, y marido de Claudina Revol Núñez, hija de Félix Revol y de Gumersinda Núñez Bazán (Cutolo, III, 719; y Lazcano, III, 322). Ciertas versiones nunca confirmadas indican que fué hijo de una violación que sufriera su madre durante un malón indígena.

<sup>8268</sup> hijo de José Javier Díaz y de Tomasa Gonsález, nieto materno de Felipe Antonio Gonsález y de Rosa Arias de Cabrera, y marido de Eusebia Igarzábal Usandivaras (Díaz de Molina, 1972, 199). Era padre de los legisladores provinciales Ramón y Emilio Díaz e Igarzábal, y suegro del Diputado Provincial Eudoro Pizarro Torres.

<sup>8269</sup> Díaz de Molina, 1972, 601. El presidente Avellaneda había interpelado a Olegario Ojeda preguntándole porqué Roca apoyaba tanto a Antonio del Viso, y atacaba a Felipe Díaz, su tío político, para Vice-Gobernador (Olegario Ojeda a Julio A. Roca, Córdoba, 11-I-1877, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). Avellaneda le pedía con insistencia a Ojeda que le escribiera a Roca para decirle "...que lo ponías en un serio conflicto al atacar a Díaz, que este era una columna poderosa de su partido en Córdoba y que desairarlo era perderlo para el partido" (Ibídem).

<sup>8270</sup> Díaz de Molina, 1972, II, 607.

<sup>8271</sup> Cárcano, 1969, 94.

<sup>8272</sup> Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano del Senador Provincial Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno Escuti, y primo hermano político del Presidente Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284).

<sup>8273</sup> Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238.

<sup>8274</sup> En orden de aparición: Luis Warcalde Padilla, Senador Provincial por Ischilín (1871-73) y Diputado

---

Nacional (1872-80); Félix Funes Díaz, Senador Provincial por Tercero Abajo (1884-92; 1903-07); Emilio Díaz Igarzábal, Senador Provincial por Tercero Arriba (1896-08); Calixto S. de la Torre González, Senador Nacional (1898-01); José Xavier Díaz Allende, Senador Provincial por Cruz del Eje (1901-09); el Gobernador Pedro J. Frías Díaz Allende, Senador Provincial por Río Primero (1919-26); Carlos Alberto Díaz Gavier, Senador Provincial por Río Primero (1920-28); Roberto A. Díaz Pizarro, Senador Provincial por Tercero Abajo (1934-38); Ernesto Díaz Yofre, Senador Provincial por Tercero Abajo (1938-42).

<sup>8275</sup> hijo de Manuel José de Ocampo y Navia y de Ursula González y Arias de Cabrera; marido de Clara Lozano Samayoa; y concuñado del político e historiador Vicente Fidel López.

<sup>8276</sup> Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238. Era el hijo del Coronel Rufino Ortega Beruti, fallecido en Pavón, nieto materno del Gobernador Pedro Molina Sotomayor (GD.1838/40); sobrino carnal del Gobernador Luis Molina Videla (GP.1859); padre del Gobernador y Diputado Nacional Rufino Ortega Ozámiz (GP.1910-14, DN.1928-32); cuñado del Diputado Provincial Francisco C. Ozámiz (DP/Mpú.1866); y primo hermano del Diputado provincial Javier Molina García (DP.).

<sup>8277</sup> Nacido en 1833, hijo del General Pedro Pascual Segura y de Rosa Galdámez, y casado en 1868 con Elena Corvalán, hija de Eugenio Corvalán Sotomayor y de Lucía Zapata Coria. Era tío del Diputado Nacional Rodolfo M. Zapata Segura (Cutolo, VI, 58).

<sup>8278</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606.

<sup>8279</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43). La Palabra había sido fundada en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>8280</sup> fundado en 1880, propiedad del Dr. Moisés Lucero.

<sup>8281</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43).

<sup>8282</sup> fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>8283</sup> fundado en 1882 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>8284</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>8285</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>8286</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>8287</sup> Suegro del que luego fuera Gobernador de Mendoza Emilio Civit.

<sup>8288</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606.

<sup>8289</sup> Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26.

<sup>8290</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 8-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27).

<sup>8291</sup> Nicolás A. Villanueva, Salvador Civit, Angel Ceretti, y otros.

<sup>8292</sup> Francisco Civit fue padre del Gobernador Emilio Civit. Ante la perplejidad de Ortega, el Comité se compuso de

"...una parte de amigos del partido y el resto de los mismos hombres del 74 y del 80 [Mitristas], el cual proclamó las adjuntas listas por las que verá que ha sido ese acto político una cosa incomprensible, pues no tiene explicación, sino es querer dar un rumbo opuesto para el porvenir, que una situación salida del seno de un partido y llena de vida con elementos propios, vaya a llamar a sí elementos espúreos y enemigos acérrimos del partido, opositores al Jefe del Partido nacional que es

---

Vd., y aún más, enemigos personales míos, consideración que no he querido tener en cuenta" (Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

En todo esto se manifestaba, según Ortega,

"...deslealtad e inconsecuencia, y detrás de ello la mano de [Juan Eugenio] Serú que pretende apoderarse de la situación, y flexible como es, con su método de política, en la que entra la dobléz y la conveniencia, a trueque de surgir, formar con esos elementos ayer relegados y vueltos a sacar a la vida política por él, un círculo peligroso para el porvenir" (Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8293</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8294</sup> En carta a Roca, E. Civit le contaba que "...las relaciones de Ortega y Benegas completamente rotas e imposible de reanudarse por ahora al menos, incidente que no ha producido dificultades ni trastornos ni división entre los amigos. Creo que a Ortega lo han fundido, han quebrado su influencia y será muy difícil la recupere. He hablado varias veces con Benegas y Serú respecto a la cuestión candidaturas a la Gobernación. Serú se me ha manifestado con toda franqueza, se me ha ofrecido sin reservas y me ha declarado repetidas veces que no aspira al Gobierno sino a una Diputación nacional. Creo que procede con sinceridad pero en Mendoza la jeneralidad no le cree y le desconfía. El hecho es que los mendocinos no le aceptan como candidato, que tiene resistencias serias y que su principal fuerza está entre los originarios de otras Provincias y que residen allá. Por otra parte lo que a él apoyan no resistirían otra candidatura caso de no surgir la de Serú como los mendocinos resistirían de todos modos la de este. Cárcano y sus amigos representados por Héctor Quesada han trabajado hasta ahora poco a Serú para que se presente como candidato y han hecho en su favor la mayor atmósfera, pero Serú no ha picado y los ha estado enterneciendo con cartas. Serú está bien, no tiene compromiso alguno con Cárcano y creo no los contraerá tampoco. Lo considero amigo suyo por todo lo que con el he hablado y creo no equivocarme si le aseguro que lo serviría a Vd. Para mostrarle el espíritu de la jente de allá le diré que con motivo de la reforma de la Constitución en el Proyecto presentado por la Comisión han puesto un artículo estableciendo que no podrá ser Gobernador un Ministro del anterior que no hubiere renunciado por lo menos dos años antes de concluir el período. A Benegas le faltan menos de dos años, el tiro iba a Serú. Hemos trabajado en la Convención y el artículo no pasará. Por mi parte le estoy sumamente agradecido a los amigos de Cárcano. Me hacen una guerra sin cuartel y combaten mi candidatura de todos modos. Dicen que habiendo estado en Europa y conversado con Vd. y siendo amigo suyo no seré jamás Carcanista y que en el Gobierno lo apoyaré a Vd. que aunque yo les hiciese a ellos las mejores declaraciones y tratase de darles las mayores seguridades de imparcialidad no me creerían. En una palabra mi situación respecto de ellas es esta. Aceptan al diablo antes que a mí. Como Vd. comprenderá todo esto no me quita el sueño, no he ambicionado ni ambiciono el puesto y lo que pueden conseguir con su actitud es que trabaje para obtenerlo, por el contrario considero un título merecer semejante oposición pues ella demuestra que soy leal y amigo suyo, que no soy un cínico desvergonzado ni un ladrón y que no me he emporcado como todos ellos en negocios sucios o latrocinios a la Nación. Me gustan mas de opositores que de amigos pues no quiero ni ser sospechado siquiera" (E. Civit a J. A. Roca, Buenos Aires, 8-VI-1888, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57).

<sup>8295</sup> Tiburcio Benegas a J. Roca, Mendoza, 8-IV-1888 (AGN, Documentación Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.57).

<sup>8296</sup> Camilo Aldao a J. Celman, Rosario, 23-XI-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26).

<sup>8297</sup> esta tipología remonta su origen a las desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos (1767), donde los mazorqueros o federales serían herederos de los denominados sarracenos, partidarios de los Jesuitas, y los denominados unitarios, herederos de los ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a la Expulsión de los Jesuitas.

<sup>8298</sup> Bravo, 1995, 18.

<sup>8299</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 20 y 27-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214; y Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>8300</sup> Barraquero, 1926, 473 y 435.

---

<sup>8301</sup> dirigido en un principio por Agustín López (1885), luego por Emilio Carmona (1886), más tarde por Silvano Bores (1887), y finalmente en forma sucesiva por Félix Corrales (1888), Pedro Márquez (1889) y Martín Posse (1890). Desplazó a La Razón (ver García Soriano, 1972, 40-44).

<sup>8302</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 210-211. El ex-Gobernador Federico Helguera había faltado a sus compromisos con el Rochismo, volcándose a favor de la situación, de filiación Irigoyenista, "...influenciado por su cuñado el Gobernador actual Santiago Gallo, que pretende guardarlo como reserva, para el caso de una alianza entre Vd. e Irigoyen. Por otra parte, el Gobernador Gallo, ha debido hacerle esta otra reflexión, que aceptando la presidencia del Comité se hacía Jefe de la oposición a su gobierno. Como aquí todo el mundo es pariente, y es eso que resuelve todo, D. Federico no se ha animado a meterse. En cuanto fuí a comunicarle que tenía la contestación suya, allanando las dificultades que él [Helguera] había puesto, me contestó, que él había hablado después con algunos amigos y que había resuelto no embanderarse todavía que esos amigos, que están comprometidos a seguir a D. Bartolo y a Gorostiaga, le habían dicho que dentro de poco tiempo se habían de unir a Vd. y que como él quería entrar sin dejar un solo amigo en otras filas, iba esperar que ese punto fuera resuelto por los mencionados amigos para entrar junto con ellos" (Carlos Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 24-VII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214)..

<sup>8303</sup> Dueño de Sauce Yaco, hijo de Vicente Posse Tejerina y de Sabina Talavera Olivera, hermano del Gobernador Wenceslao Posse Talavera, y del Diputado Nacional Emidio Posse Talavera, primo hermano del Diputado Nacional Filemón Posse Bores, y de José Posse Insúa, (a) "Pepe". Estaba casado con Carmen Colombres Ruiz Huidobro, tía carnal del Gobernador Ramón Paz Posse y del Diputado Nacional Eduardo Paz Colombres.

<sup>8304</sup> Empezó siendo oficialista en el gobierno de Benjamín Paz, opositor en el de Santiago Gallo, nuevamente oficialista en el de Juan Posse, y nuevamente opositor en el del Coronel Quinteros, oportunidad en la cual fue empastelado. Su redactor en jefe fue Pepe Posse y su principal reporter León Rosenvald. Se enfrentó a La Razón, diario dirigido por el periodista santiagueño Carlos Maldonado (García Soriano, 1972, 30-36).

<sup>8305</sup> había sido Gerente de la sucursal del Banco Nacional. Era hijo natural del ex-Gobernador Celedonio Gutiérrez, cuñado del Gobernador de Santiago del Estero Absalón Rojas, y suegro del escritor y político radical Ricardo Rojas.

<sup>8306</sup> Bravo, 1995, 18.

<sup>8307</sup> Silvano Bores, Director de El Deber, fué detenido por orden del Gobernador Posse, lo cual fué denunciado a la Cámara de Diputados, quien se lo comunicó al Poder Ejecutivo.

<sup>8308</sup> "Mientras los amigos del Dr. Juárez Celman, y el mismo Dr. Juárez, creyeron que sería fácil arrancar la renuncia al Gobernador de Tucumán, Sr. Posse, empleando la violencia, en amenazas y la cárcel, no hubo apuro en decretar la intervención, pues era mejor hacerlo después y no antes de la renuncia, para tener derecho a constituir gobierno en la forma más agradable al Presidente de la República. Pero convencidos de que no es posible arrancar esa dimisión --pues había que destruir el carácter de un hombre, cosa un poco difícil sin antes ensayar los tormentos inquisitoriales que el célebre Barreto aplicaba a los italianos Volpi y Patrone, en el Cabildo de Montevideo-- buscan entonces la intervención inmediata con el mismo empeño con que la venían retaceando. Firma: Arístipo" ("Eso de Tucumán", *El Diario*, 19 y 20-VI-1887).

<sup>8309</sup> De ahí la Copla Popular

"...Levántese Don Juan  
Que las ocho son  
Ya viene Quinteros  
Con su Batallón

Déjalo que venga  
Déjalo venir  
Qua a juerza de balas  
Lo iré hacer rendir

---

(Versión libre proporcionada generosamente por Julio Ardiles Gay Delgado).

Los sucesos de Tucumán le demostraban a *El Diario* "...que el Gobierno Nacional no es refractario al sistema del secuestro del telégrafo, como no lo ha sido con respecto a muchas otras prácticas Santistas [por Máximo Santos]; pero no satisfecho con la sustracción momentánea ni con las fiscalizaciones de oportunidad, llega a la supresión absoluta de todos los medios que el pueblo puede utilizar para saber con exactitud lo que ha pasado y lo que pasa en la capital Tucumana. No solo el telégrafo sino la correspondencia epistolar, las cartas de familia, doblemente inviolables, han estado y aún están sujetas a la inspección y al secuestro inícuo ordenado por el gobierno. Han pasado cuatro días desde que las hordas reclutadas en el bajo pueblo cordobés llevaron su asalto a la ciudad de Tucumán, bajo la inspiración y el mando inmediato de conocidos empleados nacionales; y sin embargo estamos hoy, con respecto a noticias detalladas y de buena e insospechable procedencia, casi como en las primeras horas de producidos los sucesos. A escepción del importante telegrama enviado a Córdoba por el Sr. Molina Salas, denunciando la forma en que se hizo allí el enganche y la acumulación de elementos, para lanzarlos a lo que hoy se presenta como movimiento revolucionario. Tal vez la mazorca lanzada sobre la ciudad desprevenida, a favor de la intervención disimulada y con la esperanza de la inmediata intervención sin escrúpulos, ha cometido allí actos de tal naturaleza que la sola publicidad de ellos aumentaría el descrédito en que vive el Gobierno de la Nación evidenciando la iniquidad del plan concebido contra las libertades Tucumanas. Unicamente la existencia de hechos horribles cuya responsabilidad cae directamente sobre el Dr. Juárez Celman y sus amigos, esplicaría el secuestro del telégrafo, la interrupción de la correspondencia y el forzoso aislamiento e incomunicación que pesa sobre los habitantes de Tucumán" ("Lo de Tucumán. El Telégrafo", *El Diario*, 15-VI-1887).

<sup>8310</sup> Quinteros era hijo natural del ex-Gobernador Celedonio Gutiérrez y suegro del escritor y político radical Ricardo Rojas. Quinteros había estado en Belgrano durante los sucesos de 1880. Según Juárez Celman, la revolución fué hecha "...con la colaboración de los Nougés, Padilla, Hileret, Helguera, etc" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56). Para justificar tamaña brutalidad, el Diputado Nacional por La Rioja Guillermo San Román Dávila, manifestaba que el pueblo de Tucumán había echado abajo "...el monopolio político de una familia, que la opinión pública ha llamado: la Dictadura Posse" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 17-VI-1888, p.267). Un sobrino segundo del mismo Gobernador y de Pepe Posse, Benjamín Posse Alvarez, le escribía a Roca -- contradiciendo una anterior enviada en 1881 a Juárez Celman-- que la revolución fué "...correctísima y necesaria (aunque dolorosa) que no ha dejado ni rastros de complicidad para los que nos han ayudado" (Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 16-VI-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Por lo demás, le agregaba no sin modestia que "...no necesito decirle que somos gente buena: [Líboro] Quinteros, yo, Martín [Posse], [Silvano] Bores, Eudoro Vásquez, etc., roquistas puros!" (Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 16-VI-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8311</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56). El Jefe de Policía había tratado de detener al autor del libelo pero el encargado de la Oficina de Enganche del Ejército lo impidió argumentando que dicho individuo se hallaba inscripto en la nómina del servicio (Bazán, 1992, 223).

<sup>8312</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57).

<sup>8313</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, Buenos Aires, 1887, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57.

<sup>8314</sup> Juárez Celman desmintió esta versión del telegrama, "...primero porque le hacía daño entre los amigos de esta y de Tucumán, y segundo porque conociendo su carácter y modo de proceder, no era ni verosímil de Vd. hiciera tales telegramas, sin conocer a fondo lo ocurrido y sin objeto práctico, desde que él no ....a ningún amigo en condiciones de hacer algo eficaz" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56). *El Diario* tenía poderosos motivos "...para afirmar que el proyecto cordobés, se trata de formar una liga de gobernadores en el norte de la República, entrando a formar parte de ella el de Córdoba, el de Santiago del Estero, el de Catamarca, y el de Tucumán, para lo cual serán invitados el de La Rioja, el de Salta y el de Jujuy. Ignoramos porque, se duda que Güemes quiera entrar en la confabulación de esos gobernadores, y de ahí es que se comienza a pensar en derrocarlo. Parece que [Absalón] Rojas no es de las enteras simpatías del Dr. Juárez, y por mas que sus actuales o futuros aliados intenten hacerlo entrar de lleno en la gracia del Presidente este le tiende alguna celada. Nadie da hoy puntada sin nudo, y el 4o. de línea no hubiese ido a Tucumán de puro revolucionario ni Marcos Juárez, ni Daza, ni Rojas son gente que entreguen así no mas sus elementos para aventuras sin ton ni son. Por todo eso, creemos sin duda alguna para nosotros, que es el cordobesismo que ha derrocado a balazos al Gral. Roca en Tucumán"

---

("La Revolución de Tucumán. Tiró el Diablo de la Manta", *El Diario*, 26 y 27-VI-1887).

<sup>8315</sup> Castello, 1984, 465; y Saguier, 1997.

<sup>8316</sup> concuñado del Diputado Nacional Delfín Gallo Terán, hermano del ex-Gobernador Santiago Gallo.

<sup>8317</sup> Carlos Pellegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8318</sup> *Ibídem*.

<sup>8319</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 18a. Reunión, 16a. Sesión Ordinaria, 27-VI-1887, pp.80-109.

<sup>8320</sup> Carlos Pellegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8321</sup> *Ibídem*.

<sup>8322</sup> *Ibídem*.

<sup>8323</sup> Carlos Pellegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8324</sup> *Ibídem*.

<sup>8325</sup> *Ibídem*.

<sup>8326</sup> *Ibídem*.

<sup>8327</sup> *Ibídem*.

<sup>8328</sup> Sin embargo, Juan Posse en carta a Roca le cuenta, en enero de 1887, tres meses antes del golpe, que "...van dos veces que me he dirigido a él con telegramas de atención como a la primera autoridad de la República y no me ha contestado" (Juan Posse a J. A. Roca, Tucumán, 14-I-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Asimismo, el propio Juárez Celman le confesaba a Roca que era natural que la oposición le achacara la revolución

"...pero no ha podido encontrar un solo detalle, un acto, una palabra hablada o escrita para imputármela; la revolución ha sido eminentemente popular, toda la provincia se le plegó desde el primer momento, mientras que de parte del gobierno, solo estuvieron los 300 soldados de su piquete, pues aún los milicos [sic] de campaña se pronunciaron por la revolución" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8329</sup> Al final de la carta enviada por Juárez Celman a Roca negando su participación en el golpe de estado de Tucumán, se traicionaba, pues en un raptó de sinceridad, le confesaba que la revolución de Tucumán,

"...con todos sus inconvenientes será de gran trascendencia política en el porvenir, aquella situación en la forma que se mantenía sería más tarde el núcleo de una oposición en el norte de la república y un pésimo ejemplo y precedente" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56).

<sup>8330</sup> hijo de Vicente Gallo Ispizúa y de Delfina Terán, marido de Aniceta Lagos, santafesina; hermano del Gobernador Santiago Gallo, cuñado del Diputado Nacional Dr. Luis Lagos García; y concuñado del Vice-Presidente Dr. Carlos Pellegrini. Era tío carnal del Diputado Nacional Vicente Gallo Colombres.

<sup>8331</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13-VI-1887, p.149.

---

<sup>8332</sup> Martín Posse, hermano menor de "Pepe" Posse, le advertía en 1886 a Juárez Celman para "...que se ponga en guarda con las insinuaciones que pudieran hacerle los Posse viejos, Emidio y Filemón, pues tratándose de Juan [Posse] que es el único Posse mazorquero Derquista y por consiguiente como corneta el peor de la familia, son capaces de sostener que responderá al Partido Nacional [Mitrista] aunque ha demostrado por sus hechos que no responde ni al apellido" (Martín Posse a Juárez Celman, Tucumán, 4-VIII-1886, AGN, Sala VII, Archivo Juárez Celman, Leg.23).

<sup>8333</sup> Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50. Esta misma Acordada es la que invocó la Corte Suprema en 1930 para justificar el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.

<sup>8334</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150.

<sup>8335</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150.

<sup>8336</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150.

<sup>8337</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.151.

<sup>8338</sup> Gallo, 1941, 23.

<sup>8339</sup> José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8340</sup> José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8341</sup> Hijo de Vicente Gallo Ispizúa y Delfina Terán Alurralde, hermano del Diputado Nacional Delfin Gallo Terán, y tío del Diputado Nacional Vicente C. Gallo Colombres. Estaba casado con Mercedes Molina Cossio, cuñada del Gobernador Federico Helguera Garmendia, y tía de los Diputados Nacionales Federico Helguera Molina y Ricardo Frías Silva, y del Ministro de Gobierno Eudoro Avellaneda Terán.

<sup>8342</sup> José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8343</sup> N.N. a J. Roca, Catamarca, 11-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8344</sup> N.N. a J. Roca, Catamarca, 11-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8345</sup> Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

<sup>8346</sup> primo o sobrino del Diputado Nacional Dermidio Ocampo Lema (DN.1862-66).

<sup>8347</sup> Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

<sup>8348</sup> José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8349</sup> cuñado del poderoso dueño de ingenios azucareros Clodomiro Hileret.

<sup>8350</sup> José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>8351</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.53).

<sup>8352</sup> hijo de Felipe Leguizamón Gauna, nacido en Salta, y de Gualberta del Llano, chilena; y marido de Elena Ovalle y Aragua, hija del primer presidente de Chile (Bazán, 1992, 333).

<sup>8353</sup> O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>8354</sup> ver Lacoste, 1994, 60.

<sup>8355</sup> "La renuncia del Gobernador Benegas arrancada en su prisión por los revolucionarios ha sido aceptada por la Legislatura, sesionando bajo la presión de estos acontecimientos, y elegido en la misma sesión como Gobernador Provisorio el Dr. [Antonio] Bermejo, Diputado Nacional por aquella provincia y porteño" ("Revolución en Mendoza. El Gobierno y Ministros depuestos y encarcelados. Cuatro muertos. Paz y Administración", *El Diario*, martes 8-I-1889). Al día siguiente, *El Diario* afirma que se ha despejado la incógnita, pues "...El movimiento popular que derrocó al Gobernador Benegas, ha quedado reducido a las escuálidas formas de un alzamiento militar contra las autoridades constituidas de la provincia de Mendoza. Las armas de la nación han disparado sus tiros contra el gobierno de una provincia, y el pueblo de Ortega, se compone de soldados disfrazados con sus jefes a la cabeza, reos hoy de un delito desconocido en los ejércitos regulares, fruto peculiar de estas regiones de Sudamérica, transmitidos de la madre patria, junto con la ardorosa sangre y el carácter indisciplinado. Firma: Sachem" ("Intervención a Mendoza", *El Diario*, 9-I-1889).

<sup>8356</sup> "'*El Diario*' en Mendoza. Carta de nuestro corresponsal", (*El Diario*, jueves 10-I-1889).

<sup>8357</sup> Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Buenos Aires, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Manuel Bermejo, el que fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en carta a Juárez Celman, pretendió justificarla, pues "...no se hizo violencia ni intimidación alguna a las gentes de la casa ni resultó un solo herido entre los que acompañaban al Sr. Benegas. De allí fueron conducidos Benegas a la casa de familia de Mogrovejo, Serú a la de Rodolfo Zapata, el Jefe de Policía a las de Bombal, y Deoclecio García a lo de Fabián Correa, donde han sido tratados a cuerpo de rey" (Manuel Bermejo a Juárez Celman, Mendoza, 11-I-1889, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.26).

<sup>8358</sup> sobrino tercero de Arístides Villanueva Chenaut y de Joaquín Villanueva Carrillo. Ver Columba, 1978, I, 7-15; y Villanueva Ara, 1996, 55-94.

<sup>8359</sup> Un "...gobierno de familia, con 17 parientes diputados a la legislatura" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606).

<sup>8360</sup> Olguín, 1961, 43.

<sup>8361</sup> Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26).

<sup>8362</sup> "...Inmediatamente que recibí la carta de Ortega anunciando su proyecto de revolución, le dirigí a Vd. un telegrama, y llamé a Marcos al aparato y le hice un resumen de todo. Vinieron a casa Quesada y Villanueva. Guardaron reserva al respecto, pero más luego me confesaron los propósitos y planes de Ortega cuando supieron que yo tenía carta de este último. Les reprobé completamente todo lo que pensaban, haciéndoles las mismas reflexiones que se han aducido después de los sucesos. A Ortega no le contesté ni una palabra, porque no quería ni que se sospechara que mantenía correspondencia sobre estas cosas" (Ramón J. Cárcano a Juárez Celman, Domingo 13, 1889, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.27).

<sup>8363</sup> "...los flamantes Ministros y el mismo Bermejo se han dirigido al interventor, significándole que no tienen fuerza armada para oponer a la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, pero que protestan contra ella considerándola ilegal. Fundan estas protestas nada mas que en la espontaneidad de la renuncia de Benegas, sosteniendo a capa y espada que la dimisión ha sido voluntaria, que se ha producido sin presión alguna. Estando el Gobierno en prisiones, con centinelas del 12 de Línea, tal vez amenazado de muerte presentó la renuncia de su puesto, mas apenas recobró su libertad lo primero que hizo fue declarar que su dimisión le fue arrancada por la fuerza. Los once legisladores no se preocupan de la forma en que se había producido ese documento y se apresuran a aceptar la renuncia, nombrando un nuevo gobierno de su círculo. De la única manera que se podía comprobar la espontaneidad de la renuncia era poniendo en libertad al Gobernador Benegas, devolviéndole todo su poder, y entonces cuando estuviere en posesión del mando preguntarle si insistía en su resolución de retirarse del gobierno, pero no se ha hecho así y por lo tanto es vicioso y nulo todo lo resuelto por los once representantes de la revolución. Firma: Forth" ("El Escándalo de Mendoza", *El Diario*, 11-I-1889).

<sup>8364</sup> "El Dr. Derqui no debe olvidarse del caso de Gallino, Gobernador de Corrientes, que en su arresto presentó su indeclinable renuncia. La Legislatura lo aceptó" (transcripto de *Los Andes*, "Ecos del Día. El escándalo de Mendoza", *El Diario*, 13 y 14-I-1889).

---

<sup>8365</sup> Funes, 1942, I, 363.

<sup>8366</sup> Oseas Guiñazú a Julio A. Roca, Mendoza, 19-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>8367</sup> *Ibídem.*

<sup>8368</sup> *Ibídem.*

<sup>8369</sup> sobrino del Senador y Diputado Provincial Manuel Cruz Videla Gonsález (SP/SRF.1896-04); y padre del Gobernador Carlos Washington Lencinas Peacock (GP.1924-28); y de los Diputados Nacionales José Hipólito y Rafael Néstor Lencinas Peacock; (DN.1920-28) (DN.1926-30) (Fuente: Morales Guiñazú, 1939, 309).

<sup>8370</sup> Funes, 1942, I, 367; y Olguín, 1961, 52.

<sup>8371</sup> Francisco Uriburu a Julio A. Roca, Mendoza, 29-I-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>8372</sup> *Ibídem.*

<sup>8373</sup> Emilio Civit a Julio A. Roca, Mendoza, 26-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>8374</sup> Emilio Civit a Julio A. Roca, Mendoza, 6-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.71).

<sup>8375</sup> *Ibídem.*

<sup>8376</sup> hijo de Juan Eugenio Serú y de Micaela Ladrón de Guevara, y casado en primeras nupcias con Hortensia Puebla Peñaloza, y en segundas nupcias con Carolina Palacio. Era cuñado de los Diputados Nacionales Adolfo y Germán Puebla Peñaloza.

<sup>8377</sup> Villanueva Ara, 1996, 55-94.

<sup>8378</sup> hijo de Agustín Videla y de Manuela Correas Espínola, y hermano del Diputado Provincial Daniel Videla Correas (DN.1874-78; DP/Gillén.1866). Los Diputados provinciales Carlos Videla Correas (DP/JN.1866; DP/JN.1870); y Eusebio Videla Correas (DP.1863) eran también hermanos pero eran hijos del Diputado Provincial José María Videla y de Magdalena Correas.

<sup>8379</sup> hijo del Gobernador Francisco Civit Godoy (GP.1873); y sobrino del Senador Nacional Martín Zapata Coria (SN.1854-60).

<sup>8380</sup> Emilio Civit a Julio A. Roca, Mendoza, 6-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.71).

<sup>8381</sup> *Ibídem.*

<sup>8382</sup> *Ibídem.*

<sup>8383</sup> *Ibídem.*

<sup>8384</sup> *Ibídem.*

<sup>8385</sup> *Ibídem.*

<sup>8386</sup> Emilio Civit a Julio A. Roca, Mendoza, Diciembre de 1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>8387</sup> *Ibídem.*

<sup>8388</sup> *Ibídem.*

<sup>8389</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 18-IV-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.63).

---

<sup>8390</sup> *Ibídem.*

<sup>8391</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 28-X-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8392</sup> El Banco de este nombre abrió sus puertas en Mendoza en 1868, y debió cerrarlas al poco tiempo. Pero según Cunietti-Ferrando (1989), algunos de sus accionistas, tales como Benito Borda, Carlos Mansilla, Valentín Videla, Ambrosio Lezica y otros lo revivieron con el mismo nombre en San Juan (Cunietti-Ferrando, 1989, 8).

<sup>8393</sup> A juicio de Moisés Cordero, "...sin el consentimiento del Dr. Miguel S. Echegaray, fuerte accionista, no conseguirían la liquidación, pero es el caso que este está muy mal con el Gerente [Juan J.] Videla y se presta a ello" (Moisés Cordero a Dardo Rocha, San Juan, 16-VII-1885, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214). Miguel Segundo Echegaray era hijo del Gobernador Miguel Echegaray Cano y de Nicolasa Videla Echegaray y marido de Margarita Videla Lima, hermana del Gobernador Valentín Videla Lima.

<sup>8394</sup> marido de Paz de la Presilla Astorga.

<sup>8395</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 18-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

<sup>8396</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8397</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8398</sup> Pedro A. Garro a Juárez Celman, San Juan, 7-II-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.17.

<sup>8399</sup> Luis Cané a J. Roca, Buenos Aires, 9-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8400</sup> Luis Cané a J. Roca, Buenos Aires, 16-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8401</sup> Luis Cané a J. Roca, Buenos Aires, 16-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8402</sup> Luis Cané a J. Roca, Buenos Aires, 16-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43.

<sup>8403</sup> Pedro A. Garro a Juárez Celman, San Juan, 30-V-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.17.

<sup>8404</sup> ? a Juárez Celman, Mendoza, 22-IV-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.19.

<sup>8405</sup> Carlos Doncel a Julio Roca, San Juan, 28-VIII-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.46.

<sup>8406</sup> de nacionalidad Chilena.

<sup>8407</sup> Carlos Doncel a Julio Roca, San Juan, 28-VIII-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.46.

<sup>8408</sup> Sánchez Benavídez a Juárez Celman, San Juan, 11-VI-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, 11-VI-1885.

<sup>8409</sup> Existieron contemporáneamente dos Luis del Carril, el uno Sanjuanino y el otro porteño. El Sanjuanino era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). El porteño era nacido en Mercedes, Uruguay, en 1835, hijo del Vicepresidente de la Confederación Argentina Salvador María del Carril y de Tiburcia Domínguez López, y hermano del Diputado Nacional y Vice-Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y matrimoniado con Dolores Lagos Moyano, nacida en Mendoza (Calvo, V, 166). Me inclino a pensar que el Luis del Carril de marras es el primero. Este del Carril se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65).

<sup>8410</sup> J. M. Olmedo a Juárez Celman, Córdoba, 2-II-1886, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.23.

---

<sup>8411</sup> P. Sarmiento a D. Rocha, San Juan, 12-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>8412</sup> primo hermano del Comandante Nicolás Sánchez.

<sup>8413</sup> Sánchez Benavídez a Juárez Celman, San Juan, 18-I-1886, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.24.

<sup>8414</sup> Así se denominaba a quienes ocupaban las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado Nacional en representación de provincias periféricas sin pertenecer a las mismas. Las bancas de estas provincias no estaban disponibles para los miembros de sus propias oligarquías, por cuanto los gobiernos provinciales en acuerdo con el Gobierno Nacional las reservaba a los miembros de la oligarquía central (Heras, 1959, p.XLVII).

<sup>8415</sup> "...sin causa justificada, renunció su puesto en el Senado para hacerse elegir por el período largo, de nueve años, al otro día" (Domingo Morón a D. Rocha, San Juan, 26-IV-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>8416</sup> tío del Diputado Nacional Belisario Albarracín Domínguez Mallea (DN.1922-26).

<sup>8417</sup> Federico Moreno, Juan Maurín, Salvador J. Giles, Saturnino S. Aráoz, Caupolicán Navarro y Juan Pablo Albarracín.

<sup>8418</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.49).

<sup>8419</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 2-VI-1886, I, 130.

<sup>8420</sup> hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional Severo Igarzábal; y primo hermano de los Gobernadores de La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1871-74).

<sup>8421</sup> hermano del Ministro de Hacienda de la Nación Santiago Cortínez.

<sup>8422</sup> Carlos Doncel a Roca, San Juan, 5-XI-1885, Archivo Roca, Leg.48.

<sup>8423</sup> hijo del que fuera Gobernador Provisorio en 1832 Valentín Ruiz Fernández, y de María del Cano Ramírez. Fué Diputado Nacional en 1876-80; Senador Nacional en 1888-89; Gobernador Provisorio en 1874/75; Senador Provincial en 1885-88, y Ministro de Gobierno.

<sup>8424</sup> Isaac Chavarría a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-VI-1888, Archivo Roca, Leg.57.

<sup>8425</sup> Miliband, 1970, 1988, 64. Para la noción de cooptación, ver su implementación en una rebelión Norteamericana de fines del siglo XVIII, en Gould, 1996.

<sup>8426</sup> *Ibidem*, 1988, 64.

<sup>8427</sup> *Ibidem*, 1988, 65.

<sup>8428</sup> Hijo natural del "Peludo" Celedonio Gutiérrez. Respecto al gobierno de Lídoro Quinteros, Don Pepe le aclaraba a Sarmiento que su posición es contraria a "...aquel gobierno de pillos a la manera juarista porque no tienen otro propósito que robar" (José Posse a Domingo Faustino Sarmiento, Rosario, 6-I-1888, en Castro, 1946, II, 581).

<sup>8429</sup> Hijo de Francisco Bores y de María Ruiz Huidobro Aráoz de la Madrid; marido de su prima Petrona Ruiz Huidobro; primo del Diputado y Senador Nacional Francisco L. García; y sobrino del Diputado Nacional y Juez Federal Filemón Posse Bores; y primo político del Gobernador Juan Posse Talavera. Su madre era prima hermana política de los Gobernadores Juan Manuel Silva y Bernabé Piedrabuena. Usufructuó del privilegio de editar La Razón, Bores "...ha emprendido ya su campaña atacando a todos los que aceptan la candidatura [a Diputado Nacional] de [Marco] Avellaneda" (Absalón Rojas a J. A. Roca, Tucumán, 27-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). Lo peor de todo, según Absalón Rojas, es que

---

aprovechándose de la imprenta, el redactor Bores, quien contaba sólo "...con votos de pulpería",

"...resulta aspirando también la diputación y se ha lanzado a la lucha contando mas que con el prestigio de su nombre, con la impopularidad de [Marco] Avellaneda" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 3-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

Sólo ha querido desistir de su empeño a condición de que "...se elimine la [candidatura] de Avellaneda por cualquier otra que de antemano se comprometían aceptar tanto él como los que lo apoyan" (Ibídem).

<sup>8430</sup> Hijo del prócer Dr. Domingo García y de la heroína Tucumana Doña Fortunata García.

<sup>8431</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.74, 20-XI-1919, p.348.

<sup>8432</sup> A esos efectos, observar la trayectoria y los orígenes sociales y económicos de los Gobernadores de Mendoza Rufino Ortega, de Catamarca José Silvano Daza, de Santiago del Estero Absalón Rojas, de Tucumán Próspero García, Silbano Bores y Lucas Córdoba; y de los Ministros Wenceslao Escalante y Estanislao Zeballos. Es sabido que Julio Roca se resistió a apoyar a su hermano Rudecindo --desacreditado por su rol en la destitución del Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino-- como candidato a Gobernador de Corrientes, en lugar de Manuel Derqui (ver carta de Benito Cook a Roca, Paso de los Libres, 28-III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>8433</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8434</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8435</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8436</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8437</sup> Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238.

<sup>8438</sup> nacido en 1833, hijo del General Pedro Pascual Segura y de Rosa Galdámez, y casado en 1868 con Elena Corvalán, hija de Eugenio Corvalán Sotomayor y de Lucía Zapata Coria. Era tío del Diputado Nacional Rodolfo M. Zapata Segura (Cutolo, VI, 58).

<sup>8439</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606.

<sup>8440</sup> Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, Córdoba, 2-V-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, Leg.38).

<sup>8441</sup> Luis ...a Julio A. Roca, Buenos Aires, 1-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37).

<sup>8442</sup> Hijo de Benancio Grande y Hoyos y de Leandra Ovejero y Zerda, sobrino segundo de Sixto y Querubín Ovejero y Zerda, y primo segundo de Angel M. Ovejero Zerda (Jáuregui, 1976, 132 y 133).

<sup>8443</sup> Angel M. Ovejero a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8444</sup> "...al Senador [Francisco] Ortiz sucedió otro Senador [Miguel] Ortiz y al diputado Abel Ortiz otro diputado Ignacio Ortiz y se pretendía que el Senador Ortiz lo reemplazara el primer senador Ortiz" (Miguel J. Celman a J. Roca, 15-X-1887, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>8445</sup> dirigido en 1885 por Ramiro Cañavares (Solá, 1924, 75-77; y Galván Moreno, 1944, 397).

---

<sup>8446</sup> Solá, 1924, 77.

<sup>8447</sup> Solá, 1924, 77.

<sup>8448</sup> Matienzo, 1928, 293.

<sup>8449</sup> Por el contrario, Milcíades Peña insistía en su carácter de instrumento oligárquico (Tarcus, 1996, 256).

<sup>8450</sup> Ramos, 1970, 151.

<sup>8451</sup> sobre el anarquismo, ver Zimmermann, 1995, cap. VII.

<sup>8452</sup> Grondona, 1967, 74. Sobre la crisis del 90, ver Cortés Conde, 1989, cap.VI, 209-258.

<sup>8453</sup> Haciendo énfasis en la dominación económica, Ramos (1961) asegura que la Revolución del 90 no tuvo el aspecto de una lucha social. De la extracción social oligárquica de algunos líderes de la Revolución del 90, los nacionalismos argentinos de izquierda y derecha atribuyeron un carácter reaccionario a dicha frustrada revolución. Más aún, Ramos (1961), intentó desvalorizar una hipotética naturaleza revolucionaria del Radicalismo, asegurando que los propósitos de los revolucionarios no fueron sociales, sino puramente políticos, por cuanto no se proponían sustituir a una clase social por otra, sino por el contrario, consolidar la hegemonía oligárquica de la clase terrateniente. La Revolución del 90 no tuvo, por lo tanto, para este autor, el aspecto de una lucha social entre una emergente clase media y una decadente oligarquía patricia. Fiel a esta posición, Ramos negó que en las provincias interiores hubieran existido oligarquías, reservando esta categoría sólo para las élites centrales del gobierno nacional (Ramos, 1970, 151). Tampoco vincula la amenaza obrera y anarquista de comienzos de siglo con la emergencia del Radicalismo. Sin embargo, según Peña (1965), quien sostuvo el punto de vista opuesto al de Ramos, la frustrada Revolución del 90 expresó un interés puramente defensivo, el de una oligarquía y una burguesía agraria local que intentaba impedir su propia liquidación a manos del gran capital internacional (Peña, 1965, 18).

<sup>8454</sup> concepto acuñado por Goertz y Diehl (1995).

<sup>8455</sup> Peña, 1965, 18.

<sup>8456</sup> Según Tarcus (1996), la obra de Sábato (1988) estuvo inspirada en los trabajos de Milcíades Peña (Tarcus, 1996, 240 y 248)

<sup>8457</sup> parafraseado de Morrow, 1991, 907.

<sup>8458</sup> Morrow, 1991, 907.

<sup>8459</sup> Przeworski, 1991, 69.

<sup>8460</sup> Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983; Deleuze, 1987; y Lefort, 1990.

<sup>8461</sup> Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver Deleuze, 1987, 56.

<sup>8462</sup> El Acuerdo consistía en aceptar la fórmula presidencial proclamada (Mitre-

---

Bernardo de Irigoyen) y en respetar las situaciones provinciales que habían sido elegidas mediante el fraude.

<sup>8463</sup> El Acuerdo consistía en aceptar la fórmula presidencial proclamada (Mitre-Bernardo de Irigoyen) y en respetar las situaciones provinciales logradas mediante el fraude electoral.

<sup>8464</sup> Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio" (Andrenacci, 1997, 126).

<sup>8465</sup> ver el caso del Brasil, donde los rebeldes de la Revolución Federalista de 1894 se refugiaron en Buenos Aires (Bordi de Ragucci, 1992, 131-139); y del Uruguay, donde los caudillos blancos José Núñez y Diego Lamas desembarcaron en marzo de 1897 en Colonia, provenientes de la costa Argentina, en combinación con Aparicio Saravia (Fernández Saldaña, 1945, 1164). Para el conocimiento del Partido Republicano Riograndense, ver Kittleson, 1996. Para la influencia argentina en las Revoluciones del 97 y del 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; Ponce de León, 1956, 1978; Saravia García, 1956; Barrán y Nahum, 1972; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; y Chasteen, 1995. La revolución de 1897 se inició en Buenos Aires donde funcionaba el Comité Revolucionario Oriental integrado por Eustaquio Tomé, Juan José de Herrera, Juan Antonio Golfarini y Duvimioso Terra (La Prensa, 6-III-1897, p.5). Con motivo de los sucesos bélicos el Ministro Oriental Dr. Ernesto Frías, celebró una conferencia con el Ministro de Relaciones Exteriores con objeto de pedir al gobierno argentino la mayor vigilancia posible de la costa del Uruguay, a fin de evitar el embarque de gente armada que pueda unirse a la revolución. El Presidente Uriburu hizo llamar al Ministro de la Guerra, a quien dió orden de despachar para la vigilancia de la costa del Uruguay al acorazado Independencia, la cañonera Uruguay y el caza-torpedos Santa Fé (La Prensa, 7-III-1897). La revolución terminó una vez desaparecido el Presidente Juan Idiarte Borda, al ser muerto a la salida del Tedeum en Agosto de 1897 (Idiarte Borda fué el suegro del Intendente de Buenos Aires Arturo Goyeneche y abuelo materno del político nazionalista argentino Juan Carlos Goyeneche, (a) "El Bebe"). El movimiento "...obtuvo conquistas de orden legal que establecieron la participación de la oposición en el gobierno y la reforma de las leyes electorales, con representación de la minoría y garantías para la pureza de los comicios" (Cutolo, VI, 684). Diego Lamas era un oficial Uruguayo formado en el ejército argentino, y José Núñez fué soldado en la Revolución Tricolor de 1875, habiéndose exilado en Corrientes luego de la derrota. En Corrientes participó de la lucha política local a favor del Autonomismo, habiendo sido Jefe Político de los Departamentos de San Roque y Bella Vista, y fué responsable de la masacre de Las Saladas y de un ataque contra el gobierno liberal de Valentín Virasoro, llevado en la ciudad capital en Julio de 1895 de la que resultó preso (Fernández Saldaña, 1945, 693 y 902; Cutolo, V, 73; y Castello, 1991, 489).

<sup>8466</sup> Sánchez, 1968, 282-290.

<sup>8467</sup> **La Prensa**, 21-VIII-1890, p.7. Garzón era agrimensor, hijo de Félix Garzón y Rosales, y de Juana Luisa Duarte Olivera y Caballero, hermano del Gobernador Delegado y Diputado Nacional Tomás Garzón Duarte Olivera, con cuñado del Diputado Nacional Francisco de Paula Moreno Cabral, suegro de su sobrino el Gobernador Félix T. Garzón y Moreno, y tío del Gobernador de Santiago del Estero Dámaso E. Palacio Achával. Estaba casado con Carmen Gómez Argüello, natural de La Punilla, hija de Toribio Gómez y de

---

Eloísa Argüello (Cutolo, III, 269; Gómez, 1990, 13; y Lazcano, I, 221).

<sup>8468</sup> Según La Prensa, "...a pesar de la prohibición del gobierno y la policía para que tuviera lugar hoy la manifestación festejando la separación de D. Marcos Juárez esta se ha verificado, pues todo el pueblo anda en las calles y la ciudad toda está embanderada, el Club Unión Cívica lleno de gente y en la calle hay numerosos grupos que disuelve la policía, volviéndose a formar en otras partes" (La Prensa, 23-VIII-1890, p.5).

<sup>8469</sup> seguidores de Marcos Juárez.

<sup>8470</sup> Dirigidos por el Dr. Carlos Tagle, Presidente del Club Unión Nacional.

<sup>8471</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 18-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>8472</sup> antiguo liberal nacionalista que habiendo pertenecido a las filas del Mitrisimo, fué uno de los fundadores de la Unión Cívica de Córdoba (Sánchez, 1969, 214). Era hermano del Diputado Provincial Ramón Díaz e Igarzábal; y del Senador Provincial Emilio Díaz e Igarzábal (SP/Tercero Arriba, 1896-1908); suegro del Diputado Provincial Eudoro Pizarro Torres; tío del Senador Provincial José Javier Díaz y Allende (SP. 1901-09); primo hermano del Candidato Presidencial de los Partidos Unidos Manuel José de la Cruz Ocampo y González; y abuelo del Senador Provincial Carlos Alberto Díaz y Gavier (SP/Río Primero, 1920-28).

<sup>8473</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 12-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8474</sup> El Club político dirigido por Marcos Juárez.

<sup>8475</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 12-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8476</sup> *Ibidem*.

<sup>8477</sup> *Ibidem*.

<sup>8478</sup> *Ibidem*.

<sup>8479</sup> Nació en Buenos Aires en 1839, hijo del General Cesáreo Domínguez y de Antonia Maistre, y marido de Catalina del Campillo, hija del Gobernador Delegado de Córdoba Juan Crisóstomo del Campillo y de Felipa Catalina Gómez y Funes. Domínguez era cuñado de los Diputados Nacionales Donaciano y Juan Bautista del Campillo, y concuñado de los Diputados y Senadores Provinciales y Nacionales Hilarión Funes y Roldán, José Eugenio Centeno y Carranza, José María Ruiz Rodríguez, y Manuel de la Mota González (Gómez, 1990).

<sup>8480</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8481</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII,

---

Arch. Roca, Leg.60).

<sup>8482</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 23-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>8483</sup> nacido en 1844, hijo de Manuel Astrada y de Clara Barreiro, y marido de Angelina Carmona (Cutolo, I, 260).

<sup>8484</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 23-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>8485</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60).

<sup>8486</sup> Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 4-VII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.64).

<sup>8487</sup> Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 4-VII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.64).

<sup>8488</sup> célebre cartógrafo y agrimensor.

<sup>8489</sup> Diego Chapeaurouge a J. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>8490</sup> redactor de El Eco de Córdoba (Galván Moreno, 1944, 347), y sobrino de los Senadores Provinciales Osvaldo y Luis Vélez Moyano.

<sup>8491</sup> Diego Chapeaurouge a J. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>8492</sup> un Paloma Blanca de la Unión Cívica, redactor y dueño de los periódicos ***La Picota*** y ***El Debate***.

<sup>8493</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 18-VI-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64). Permítaseme citar a Saguier (1993).

<sup>8494</sup> marido de Eustolia de Iriondo Candioti, hermana del Gobernador de Santa Fé Simón de Iriondo (Cutolo, V, 530). Para ***El Diario***, dirigido por Manuel Láinez, el Gobernador Pizarro "...es el ejemplar más típico que ha producido la época informe y caótica en que ha caído el país, en esta rotación política que después de sacarlo del régimen del personalismo criollo, torpe e ignorante, lo entrega al personalismo infuloso y didáctico, que por rodeos discursivos y peregrinas teorizaciones tiende a implantar un juarismo filosófico y pedante, que va en regresión al unicato a título de una arrogante infalibilidad oficial que condena las energías vivas de la opinión encarnadas en los partidos. El Juarismo desconocía la existencia de los partidos, a título de regente exclusivo de la opinión, el Dr. Pizarro llega a la misma anulación, a título de omnisciencia, de sus virtudes infusas, de un racionalismo político clarividente que tiene por privilegio una visión del bien público depurada de la aberración de las pasiones militantes. Pizarro es, en resumen, un Marcos Juárez que se ha puesto sobre el chambergo una birreta, y sobre el chiripá una

---

toga: uno era el personalismo rudo y analfabeto; el otro, es el personalismo docto y declamatorio; es una transfiguración política que agrava los peligros del régimen al revestirlo de los falsos oropeles académicos. Firma: Grapho" ("Mensajes Académicos. Juarismo Filosófico, El Diario, 2-V-1893).

<sup>8495</sup> futuro Diputado Nacional entre 1898 y 1900.

<sup>8496</sup> padre o hermano del Senador Provincial por Totoral Pedro Vieyra Latorre Arias (SP.1902-06).

<sup>8497</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 13-XII-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>8498</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 29-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>8499</sup> Botana, 1988, 38.

<sup>8500</sup> Dirigido por el Dr. Pedro C. Molina. Los ejemplares de este periódico habrían desaparecido del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad de Córdoba, según lo denuncia Alfredo Díaz de Molina (Díaz de Molina, 1972, II, 558 y 571).

<sup>8501</sup> Dirigida por Eleodoro Fierro.

<sup>8502</sup> este periódico circuló entre 1886 y 1893 (Galván Moreno, 1944, 347).

<sup>8503</sup> Julio Astrada a Julio A. Roca, Córdoba, 16-XII-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66). Sobre las contradictorias actitudes del Gobernador Pizarro a propósito del proceso judicial incoado a los constructores del Dique San Roque Juan Biale Massé e Ing. Casaffousth, y su renuncia al cargo de Gobernador, ver Frías, 1985, 424-428.

<sup>8504</sup> Según Chapeaurouge, "...para lo que se ha prestado más dinero, ha sido para que compraran terrenos en los biscacherales de la Alta Córdoba a 5 y 10 pesos vara donde no valía 10 centavos y ese negocio era de [José] Rodríguez del Busto y [Ramón J.] Cárcano y parte de Marcos [Juárez] y después de que el primero se ha enriquecido tira de la manta" (Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>8505</sup> Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>8506</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60. Abogados de nota opinan, a juicio de B. Domínguez, que el Banco Provincial por estar bajo la jurisdicción de la Oficina de Bancos Garantidos y de sus Inspectores estaba fuera de las prescripciones del Código Comercial y por ende no debía tener Síndico. Sin embargo, "...como el Ministro de Hacienda ha aceptado las denuncias de este funcionario, no se ha querido darlo por suspendido" (B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60).

<sup>8507</sup> Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 8-X-1890, Arch. Roca, Leg.60.

---

<sup>8508</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 17-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8509</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 19-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8510</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 24-IV-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>8511</sup> hijo de Francisco Bores y de María Ruiz Huidobro; y primo hermano político de su opositor el Gobernador Juan Posse Talavera.

<sup>8512</sup> "...El Sr. Manuel Gorostiaga ha sido reducido a prisión, así como los Señores Emilio Sal, Justino Posse, Dr. Martín Berho, Dr. Eugenio Méndez, y se busca al Dr. Servando Viaña, presidente de la Unión Cívica y al Sr. Juan Posse" (*La Prensa*, 24-VIII-1890).

<sup>8513</sup> La Prensa, 5-X-1890, p.6. García era hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata García, aquella heroína que rescatara de la pica la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán.

<sup>8514</sup> hijo de Jesús María Aráoz y de Epifania Ormaechea y Saravia, hermano menor del Diputado Nacional Luis Felipe Aráoz Ormaechea, y sobrino nieto del Gobernador Diego Aráoz Valderrama (Cornejo, 1942, 99). Vinculado por parentesco con el notable escritor y publicista Juan Bautista Alberdi.

<sup>8515</sup> Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 30-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>8516</sup> por el político Próspero García (a) "Flor de Manzanillo".

<sup>8517</sup> por los Diputados Provinciales Abrahám y Martín Medina.

<sup>8518</sup> Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 30-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>8519</sup> hermano de los Diputados Provinciales cordobeses Alfredo y Ramón de Olmos y Freites Avila y del Diputado Nacional Dermidio A. de Olmos y Freites Avila (DN.1888-92); y padre del Gobernador de Córdoba y Senador Provincial Lucas A. de Olmos y Vásquez.

<sup>8520</sup> José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>8521</sup> *Ibidem*.

<sup>8522</sup> que consistía en un pacto explícito pues integraba listas comunes entre Autonomistas y Cívicos Mitristas (Botana, 1988, 38).

<sup>8523</sup> León Rosenvald a Julio A. Roca, Tucumán, 1-II-1891 (AGN, Sala VII, Archivo

---

Roca, Leg.62).

<sup>8524</sup> Silvano Bores al Dr. García, La Invernada, 27-VIII-1892 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12). En esta misma carta Bores le escribió a Próspero García para que se empeñara con el Gobernador sobre la conveniencia de nombrar un Comisario en La Invernada, "...dándole un soldado, pagado por mí, y para que el servicio sea completo, podría indicarlo a Dn. José Peña, quien ha fijado nuevamente su residencia en ésta. Sería también conveniente nombrar Juez de Paz Auxiliar a Don Fidel Barrionuevo, quien lo desempeña en Comisión sin decreto del Gobierno" (Silvano Bores al Dr. García, La Invernada, 27-VIII-1892, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12). Bores lo suponía a Próspero García "...con la cara vuelta hacia Buenos Aires para ver que es eso que está en la Presidencia [Sáenz Peña] si un Dictador o un loco. Vano empeño! Solo se distingue al aturdido que ha pasado por el Gobierno, como un remolino de tierra, empolvándolo todo: constitución, leyes, hombres y partidos. Sin principios acentuados de gobierno, repite un día testualmente la frase de [Lorenzo] Latorre [Dictador Uruguayo] para darse corte de observador; sin el valor impetuoso y perseverante del Dictador, tan pronto está con los puños cerrados como con el semblante lánguido del que retrocede vencido por sí mismo. Fué la sombra de la autoridad y por donde ha pasado interceptó la luz. ¿No lo vé condenando a Mitre sin comprenderlo? Se ríe de una renuncia [la de Mitre], que la posteridad la recogerá como enseñanza y ejemplo de abnegación y patriotismo. Esa renuncia es luz proyectada sobre el abismo de la actualidad argentina. Si no existiera, nada bueno encontrarían los tiempos venideros en los hombres del presente. Bien puede Washington desde la inmortalidad tender la mano a su discípulo del Sud. Es propiedad de los aturdidos apunarse en las alturas y considerarse más altos que los que vuelan por encima de sus cabezas" (Silvano Bores al Dr. García, La Invernada, 27-VIII-1892, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12).

<sup>8525</sup> Hijo de Ramón Posse Talavera y de Genuaria Zavalía Iramain, y sobrino carnal por parte de su padre de los Gobernadores Juan y Wenceslao Posse Talavera, y por parte de su madre de los Doctores Salustiano y David Zavalía Iramain. Casó con Lucía Costanti y López Zamora (Calvo, II, 412).

<sup>8526</sup> Zenón Santillán a Julio A. Roca, Tucumán, 21-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8527</sup> Zenón Santillán a Julio A. Roca, Tucumán, 21-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8528</sup> *Ibidem*.

<sup>8529</sup> Necesitando ganar al Elector Pedro Márquez, de Lules, sobre quien tenía influencia el Sr. Hileret, y sobre éste Ernesto Tornquist, Lucas Córdoba le preguntaba a Roca "...¿No podrías tú obtener una cartita a este objeto, del Sr. Tornquist para el Sr. Hileret o dirigirte vos mismo a este último, directa o por interpósita persona?" (Lucas Córdoba a J. Roca, Tucumán, 26-VI-1893, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.67).

<sup>8530</sup> Entre los que se contaba Lucas Córdoba, los Senadores Rufino Cossio, y Emilio Carmona, y los Diputados Marcos Muñoz, Augusto M. Aráoz, Virgilio López García, Francisco Mendioroz, Abraham Medina, Ramón V. López, Pascual Place, Manuel García,

---

y Santiago Colombres (h) (Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 6-X-1893, AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8531</sup> hijo de Marcelino de la Rosa y Gertrudis Liendo, marido de Elisa Aráoz Ormaechea, hermana del que fuera Gobernador de Tucumán Benjamín Aráoz; y sobrino del Gobernador Tte. Cnel. Octavio Luna y Liendo (Cutolo, VI, 412).

<sup>8532</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8533</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 30-IV-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67)

<sup>8534</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67)

<sup>8535</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67)

<sup>8536</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67)

<sup>8537</sup> *Ibidem*.

<sup>8538</sup> yerno del dueño de ingenios Pedro Méndez.

<sup>8539</sup> hijo de Rufino Cossio y Villafañe Aráoz, y de Juana Rosa Gramajo Molina, marido de Dorotea Paz Terán, hija del Representante en la Legislatura Rosista Manuel Paz. Fué padre del Diputado Nacional Pedro Cossio Paz (Calvo, V, 197).

<sup>8540</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Esta tipología remonta su origen a las desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos (1767), donde los mazorqueros o federales serían herederos de los denominados sarracenos, partidarios de los Jesuitas, y los denominados unitarios, herederos de los ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a la Expulsión de los Jesuitas.

<sup>8541</sup> *Ibidem*.

<sup>8542</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 30-IV-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Ver la crónica titulada "El escándalo tucumano", en *La Prensa*, 1-IX-1893.

<sup>8543</sup> Páez de la Torre, 1987, 573-574. Ver la crónica titulada "El escándalo político de Tucumán", en *La Prensa*, 3-IX-1893.

<sup>8544</sup> ver la crónica titulada "La Revolución de Tucumán. El Gobernador en el Cabildo. El próximo ataque", en *La Prensa*, 8-IX-1893.

<sup>8545</sup> célebre por haber ideado en las luchas electorales de La Rioja de 1874 un telégrafo casero, denominado "telégrafo de Bravo", que consistía "...en un bombo que lo

---

puso en su habitación, de manera que al sentirse en peligro lo tocaba para que vinieran sus compañeros" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.580).

<sup>8546</sup> formado por el Dr. Eugenio Méndez, y los ministros Martín Berho y Manuel Paz Terán (Torres, 1959, 316; y Páez de la Torre, 1987, 573-574).

<sup>8547</sup> nacido en 1843, era hijo de Francisco Bosch y de Dominga Cascallares y Chávez, y padre de los Mayores Francisco y Roberto Bosch, quienes se rebelaron contra el gobierno del Gral. Agustín P. Justo. Por su madre era primo hermano del Jefe de Policía de la Capital Marcos Paz y del Gobernador de la Provincia Máximo Paz, y marido de María Laura Saénz Valiente (Yaben, II, 437-439; y Cutolo, I, 507). Y por su padre era primo segundo del Canciller Ernesto Bosch (Calvo, I, 299).

<sup>8548</sup> B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69.

<sup>8549</sup> a partir de 1885, cuando tenía 37 años de edad, fué reportero de El Orden (García Soriano, 1972, 32).

<sup>8550</sup> sobrino carnal de Antonino y Manuel Taboada.

<sup>8551</sup> hijo del Inspector Pablo Lascano y de María de Jesús Gorostiaga, sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga.

<sup>8552</sup> B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69.

<sup>8553</sup> ver las crónicas publicadas en el periódico *El Diario* (Buenos Aires), desde el 8 al 20 de Septiembre de 1893.

<sup>8554</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8555</sup> nacido en 1841, hijo de Nabor Córdoba y de Ester Luna y Liendo, y casado con Mercedes Arias Guerra, había militado en el nacionalismo Mitrista en 1874 y 1880.

<sup>8556</sup> ver Etchepareborda, 1968.

<sup>8557</sup> Presidente del Club Libertad, pariente del Senador Absalón Rojas, hermano del Diputado Nacional Cristóforo Ruiz Alvarado (DN.1890-94), y tío carnal del Gobernador Adolfo Ruiz.

<sup>8558</sup> Rafael, 1982, 72.

<sup>8559</sup> hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra (GP.1878); con cuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra (DN.1882-86); y tío del Diputado Nacional Benjamín Palacio Santillán (DN.1896-04).

<sup>8560</sup> Director del semanario El Pueblo. Hijo de Francisco Olivera y de María del Rosario Rueda y Frías, nieto materno de Pedro Ignacio Rueda y de María Apolinaria Frías y Araujo, y casado con Mercedes Olachea y Alcorta (Frías, 1956, 260). Era hermano de

---

Diego Olivera, ejecutado por Taboada.

<sup>8561</sup> E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8562</sup> cuñado de los Diputados Nacionales Dámaso y Benjamín Giménez Beltrán (DN.1890-94) (DN.1884-00).

<sup>8563</sup> E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8564</sup> E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>8565</sup> hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa Lami, y marido de Luisa Palacio (Lazcano Colodrero, I, 457).

<sup>8566</sup> José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). En ese sentido, para Vieyra, el único que tenía verdadera influencia familiar y popular era Manuel Gorostiaga: "...su familia a mas de numerosa, está vinculada al antiguo partido Taboadista, unido, compacto y de pié" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). Los demás, eran

"...cubileteros, pertenecientes a todos los gobiernos que consideren florecientes y fuertes. Vividores o explotadores de la renta pública, de los Bancos, tanto provincial como nacionales, quienes han buscado vinculaciones con los miembros de los hombres del poder, para hacer traspasos de sus deudas a gentes irresponsables y desconocidas, formando así una solidaridad criminosa de intereses mutuos, para evitar acusaciones y acriminaciones públicas, que tanto ensuciarían a los unos como a los otros" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

Asimismo, la familia Santillán, tenía en su seno a unos sobrinos carnales de apellido Zavalía (hijos de Agapito Zavalía Laguna y de Josefa Gondra Lastra, en Calvo, II, 410), de los cuales el mayor de todos, Napoleón, era encargado de la "Sociedad Edificadora", la cual tenía

"...todos sus negocios de edificación Nacional y Provincial, siendo socios Rojas, Ruiz, Sosa, Bruchman y todos los corifeos familiares de la camarilla oficial. La vinculación de intereses mutuos en comandita: ¡pobre patria!" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

Los Zavalía, en opinión de Vieyra, "...no sirven ni como políticos ni como nada, y con mucha propiedad les diría, en estos días, el periódico de oposición, 'son como el ombú, que sólo sirve para sombra'" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). Eran dignos miembros "...de la familia vividora de Santillán, tan afecta a las pitanzas y al presupuesto" (José Antonio Vieyra a

---

Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>8567</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 21-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>8568</sup> José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 28-VII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>8569</sup> José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 28-VII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>8570</sup> Hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros, y del Diputado Nacional Martín Posse.

<sup>8571</sup> Director del periódico *El País*, fundado en 1890. Hijo del Gobernador Luciano Gorostiaga y de Adela Paz; primo hermano del periodista Mariano Gorostiaga; era por parte de su padre sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y por parte de su madre sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de *La Prensa*, José C. Paz.

<sup>8572</sup> Noble, 1960, 439; Rafael, 1982, 82-85; y Bazán, 1992, 225-226. La Revolución fué encabezada por Manuel Gorostiaga y Napoleón Taboada (Sommariva, 1931, II, 197; Díaz de Molina, 1972, II, 640-41; y Achával, 1988, 383). A juicio del Ministro Manuel Quintana, en su refutación a las conocidas expresiones del Diputado Magnasco, reproducidas por Rafael (1982), "...Un gobierno, por el hecho de existir, tiene en su favor la presunción de la legitimidad; mas esa presunción, como todas las presunciones humanas, tiene que ceder a la prueba de la verdad. Mientras ese gobierno, cualesquiera que sean los vicios de su constitución, funciona regularmente, sin protesta y sin contestación, recibiendo el acatamiento popular, ¿a que título, con que derecho, con qué objeto, diré repitiendo las palabras testuales del discurso invocado por el señor diputado, irían los poderes federales a demandarles los títulos en cuya virtud existe? Cuando un gobierno no funciona regularmente, cuando no es acatado por el pueblo de la provincia, cuando, por el contrario, los convecinos puestos en armas logran derrocarlo, y se vé en la triste necesidad de acudir al último recurso de la intervención nacional, entonces, este hecho, que es el punto determinante, la base fundamental de la acción de los poderes públicos, impone deberes, pero acuerda derechos a los poderes interventores...Si la constitución nacional se hubiera limitado a decir poderes derrocados o poderes existentes, el señor diputado tendría perfecta razón para sostener que el poder ejecutivo, al desempeñar la autorización de intervenir, no tiene el derecho de examinar sus títulos, de apreciar su composición y decidir en consecuencia si son o no dignos de la protección nacional. Pero cuando la Constitución ha dicho, y dicho categóricamente, poderes constituídos, por más restrictiva que sea la justa interpretación de la disposición constitucional en materia de intervenciones, es necesario admitir ese derecho; porque la constitución no ha sido hipócrita para confundir poderes constituídos con simples poderes existentes" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 23-X-1892, 5a. sesión extraordinaria, p.59).

<sup>8573</sup> Díaz de Molina, 1972, II, 646; y Rafael, 1982, 92.

<sup>8574</sup> marido de Florencia Santillán.

---

<sup>8575</sup> Pedro Barraza a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-II-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>8576</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, 259.

<sup>8577</sup> Rafael, 1982, 100 y 105; y Bazán, 1992, 220.

<sup>8578</sup> hijo del Gobernador Interino Pedro Pablo Olaechea (GI.1853); hermano del Pbro. José Baltasar de Olaechea y Alcorta (GP.1876-78); primo del Presidente José Figueroa Alcorta (Presid.); y tío del Diputado Nacional Guillermo P. Olivera (DN.1908-12) (Fuente: Rafael, 1982, 132).

<sup>8579</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8580</sup> Idem.

<sup>8581</sup> Idem.

<sup>8582</sup> Idem.

<sup>8583</sup> Idem.

<sup>8584</sup> Diputado Nacional y futuro Gobernador.

<sup>8585</sup> Diputado Nacional.

<sup>8586</sup> ex-Diputado Provincial.

<sup>8587</sup> Diputado Provincial en 1908.

<sup>8588</sup> ex-Diputado Nacional y futuro Senador Nacional.

<sup>8589</sup> ex-Juez Federal y futuro Diputado y Senador Nacional.

<sup>8590</sup> Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

<sup>8591</sup> Idem.

<sup>8592</sup> Idem.

<sup>8593</sup> Rafael, 1982, 108.

<sup>8594</sup> Rafael, 1982, capítulo X. Dos años después, en 1898, la investigación del crimen fué dando sus frutos, pues se determinó que "...el que hizo el disparo que dió muerte al ex-Diputado Pedro García no es el tal Mariano Noriega, como maliciosamente se aseguró en un principio. Es Angel Ruiz, sobrino del ex-Gobernador, que hasta la noche del 27 de Agosto permaneció preso por haber asesinado en la campaña a un apreciable vecino. Esa noche fué sacado de la celda y mandado en la comisión por orden del entonces Jefe de

---

Policía José A. Silvetti. Angel Ruiz tiene fama de ser un gran tirador y hombre arriesgado. Antes de cometer su primer asesinato, hacía aquí una vida fastuosa, merced a la fortuna de una viuda con quien contrajo matrimonio. En una conversación mantenida con otro de los presos, Ruiz ha declarado que ninguno de sus compañeros llamó a la puerta de calle de la casa de García, sino que todos entraron por los fondos de la casa, capitaneados por los comisarios Justo Figueroa y Benjamín Alaniz Plaza y por los ex-presidarios Sargento Gómez y N. Noriega (*La Nación*, 2-X-1898). Sin embargo, al compararlo con el caso del periodista Sanjuanino José F. Echevarría, ultimado también por la policía en 1902, el corresponsal de *La Prensa* llegaba a "...conclusiones pesimistas sobre el resultado de las gestiones judiciales. En Santiago del Estero se quiso eliminar a un ciudadano enérgico, con prestigio popular y capaz de ser valla poderosa contra el personalismo de un pequeño círculo que se había adueñado del gobierno y que pretendía perpetuarse con ridículas y menguadas combinaciones. Para eliminarlo, la policía no tuvo valor suficiente, a pesar de su reconocida temeridad, y echó mano a uno de los presos que tenía en la cárcel pública para consumar el hecho sangriento. La policía creyó que así salvaba su responsabilidad penal y también el pensamiento de la institución, en todo cuanto eran capaces de comprenderlo así funcionarios ignorantes y apasionados" (*La Prensa*, 9 de Enero de 1902, "Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos").

<sup>8595</sup> Exposición del Diputado Nacional Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.97.

<sup>8596</sup> ver Melo, 1966. Para esa época, el clima antisemita generado por el affaire Dreyfus penetró en los ámbitos próximos al Mitrismo, la facción opositora oficial al PAN (McGee Deutsch, 1986, 45-47; citado en Andreassi Cieri, 1996, 41, nota 44). Sobre el anticlericalismo judío y la emergencia del moderno antisemitismo francés, ver Millman, 1992.

<sup>8597</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, p.273.

<sup>8598</sup> Adolfo Ruiz a J. Roca, Santiago del Estero, 21-VI-1898 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.78). Sobre la oposición Pellegrinista al gobierno de Ruiz, ver El Diario, 20-V-1897.

<sup>8599</sup> Sobrino político del Gobernador de Córdoba Eleázar Garzón, y cuñado del Gobernador Félix T. Garzón y Moreno.

<sup>8600</sup> Al gobierno del Dr. Palacio lo caracterizó, de acuerdo a la columna "Ecos del Día", del periódico *El Diario*, "...una conmovedora preferencia por la familia...nos dieron una lista de todos los parientes colocados en sustanciosas canongías: no se puede publicar por que es muy larga, aunque instructiva. Nada menos que 32 primos, sobrinos, tíos y cuñados tiene el Dr. Palacio colgando de las plácidas ubres provinciales, en los puestos más lechosos --diputaciones, puestos bancarios, ministerios, receptorías, cargos de policía, etc., 32 parientes! Es gracias a esta previsora ubicación de parentela que el Dr. Palacio disfruta de alguna opinión en la provincia por mas que sea una opinión consanguínea y doméstica!" (El Diario, 8 y 9-IV-1900). Dicha lista de parientes se publicó en el número siguiente de El Diario, correspondiente al 10-IV-1900, bajo el título "Los gobiernos de familia. Elenco de los parientes del gobernador".

<sup>8601</sup> era el único "...que en Santiago poseía en su casa particular una cancha para jugar

---

a la taba alumbrada con luz eléctrica" (*El Diario*, 10-VII-1901).

<sup>8602</sup> Rafael, 1982, 127.

<sup>8603</sup> Exposición del Diputado Nacional Adrián C. Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.99.

<sup>8604</sup> Exposición del Diputado Nacional Adrián C. Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.99. La revolución estallada en Santiago del Estero, "...viene preparándose hace tiempo por acción directa del Dr. Figueroa Alcorta, para destruir la influencia de los Sres. Santillán, Barraza, etc. que consideraba como sus adversarios políticos por el hecho de ser los amigos personales del Gral. Roca. Una inteligencia posterior entre el Dr. Figueroa y el Gobernador Santillán, que se le entregó por completo, poniendo a su disposición las diputaciones nacionales y la gobernación de Santiago, detuvo la acción presidencial contra Santillán. Y el temor del Dr. Figueroa de que la revolución por él preparada llegase a estallar, a pesar de su inteligencia con aquella situación, lo llevó hasta poner a las órdenes del Gobernador Santillán, el batallón de línea allí situado por medio de un telegrama que le transmitió al entonces jefe militar de aquella región, el Coronel Gordillo. El Gobernador Santillán ha ampliado su compromiso, eligiendo entre otros diputados al Sr. Olaechea Alcorta, primo del Vice, y a otro sobrino, el Sr. Olivera Alcorta; pero quedaba pendiente la gobernación para el Senador Pinto, que encontraba resistencias dentro de los mismos amigos del Gobernador Santillán y seguramente el temor de que esa candidatura fracasase, ha hecho revivir y estallar la revolución que preparaba el Dr. Figueroa Alcorta contra la situación actual de aquella provincia...No determina [el cable] quienes son los jefes del movimiento por mas que se sabe que ha sido realizado por los autonomistas o sea presidenciales. Se citan, sin embargo los nombres del Sr. Delfín Vieyra, del Diputado Provincial Nicanor Salvatierra y de otros personajes de ese matiz político que hasta ayer se dividían electores de gobernador con el Doctor Santillán, simulando ambos un perpetuo acuerdo al calor de la reacción presidencial" ("La Revolución en Santiago", *El Diario*, viernes 24-IV-1908).

<sup>8605</sup> Melo, 1964, 105, nota 5.

<sup>8606</sup> Según referencias que trae a colación *El Diario*, "...los apellidos Ortiz y Uriburu habrían vuelto a surgir enfrentados en una recrudescencia de las viejas enemistades, como dos adversarios que no se perdonan todavía, que están resueltos a batallar por su supremacía efectiva de la aldea" ("Cosas de Salta. Síntomas de regresión", *El Diario*, 7-IX-1905).

<sup>8607</sup> Dueño y fundador del Ingenio Ledesma. Era hijo del Gobernador Sixto Ovejero Zerda (GP.1867), primo del Diputado Nacional Ángel M. Ovejero Zerda (DN.1890-94; 1902-06), cuñado del Gobernador Interino Arturo S. Torino Solá (Int.1921), y concuñado del candidato a Gobernador de Los Andes Ricardo Isasmendi Dávalos (Cand. Gob. Los Andes, 1903).

<sup>8608</sup> El Gobernador Ovejero era, para *El Diario*, muy bromista. Tan bromista "...que está asustando a los Salteños, a quienes hace creer que elegirá Senador Nacional a su suegro Francisco Ortiz y a su primo hermano Don Ángel Mariano Ovejero, diputados a su primo Ignacio Ortiz y su otro primo Abraham Cornejo (primo hermano Don Ignacio de Don Francisco, y sobrino de este mismo Don Abraham); y dejará la gobernación a su otro

---

primo hermano Don Luis Linares. Además, y para que la broma sea completa y crean los Salteños que su gobernador padece de una obsesión doméstica insanable, hace circular entre los hombres del gobierno esta otra lista de candidatos para Senador Sidney Tamayo, su cuñado; y a Sixto Ovejero, su hermano en ambas sangres, para Diputado a Don Angel Mariano [Ovejero], y para sucederles en el mando Don Ricardo Isasmendi, cuñado...El hombre es chacotón y jovial y gusta de esas diversiones propias de espíritus selectos" ("¡Muy Bromista!", *El Diario*, 14-IX-1905). En una actitud precursora a la del Gobernador de Buenos Aires José Camilo Crotto, el ajuar con que visitó Ovejero al Dr. Quintana y a todos los Ministros del Poder Ejecutivo, cuando vino a Buenos Aires se formaba así: "...jaquet primaveral adornado de arrugas divergentes, botones amarillos de fantasía, corbata celeste con lunares morados y cuellos ajustados, que parecía degollarle el pescuezo, con la consiguiente expresión congestional en la cara" ("¡Muy Bromista!", *El Diario*, 14-IX-1905).

<sup>8609</sup> Linares era hijo de Florentín Linares Toledo Pimentel y de Dolores Usandivaras y Ovejero, y nieto materno de Manuel Usandivaras y Díaz de la Fuente y de Florentina Ovejero Zerda. Su abuelo Manuel Usandivaras había contraído un segundo matrimonio con Servanda Zerda y Medina, hermana mayor del que fuera Gobernador de Salta Don Angel Zerda y Medina; y su abuela Florentina era hermana y tía carnal de los que fueron fundadores y dueños del Ingenio Ledesma y Gobernadores de Salta y Jujuy Sixto Ovejero Zerda, David Ovejero Gonsález, y Daniel Ovejero y Tezanos Pintos (Jáuregui Rueda, 1976, 132 a 134).

<sup>8610</sup> hijo de Manuel Ovejero y de Saturnina Zerda y Medina, sobrino del Gobernador Sixto Ovejero, y marido de Dolores Linares Usandivaras. Era cuñado del Gobernador de Salta Luis Linares Usandivaras, y primo hermano de los Gobernadores de Salta David Ovejero González y Avelino Figueroa Ovejero y del Gobernador de Jujuy Daniel Ovejero Tezanos. "...El 'submarino' es primo del Gobernador, pero el suegro [Ortiz] con el mismo punto le ganó de mano, y ahora su excelencia se resiste a enviar una representación tan familiarmente confeccionada. Quiere, para librarse de la crítica, acoplar al suegro a cualquier personaje de gran figuración, dando así puesto en el senado a un pretérito un tanto borrado del escalafón de la política nacional que llegaría disimulado por un actuante de relieve. Sin la intervención submarina del primo, la cosa habría pasado como en el mejor de los mundos, pero la legislatura parece haber sentido una ligera cosquilla que la ha hecho encabritarse y no obedecer con la acostumbrada docilidad a la mano de S.E., constituyendo un grupo bastante fuerte, que a pesar del gobernador, quiere elegir al habilidoso navegante de la política salteña que ha tenido fuerzas para apartar a la mayoría que el cariño filial de un buen yerno había organizado" ("Las Senaturías Salteñas", *El Diario*, 7-VI-1906).

<sup>8611</sup> "...Entre dos aguas ha metido la quilla en la mayoría del suegro del gobernador, y uno que otro torpedo oportuno lanzado desde las profundidades del agua en que navega, han concluido con la unanimidad regimentada por el Gobernador para provecho de su familia, al punto de que su excelencia con serias averías legislativas, ha resuelto abandonar el chaquete con que mayiza sus ocios de pastor de la grey salteña y emprender esta peregrinación en busca del santo óleo de la coalición" ("Las Senaturías Salteñas", *El Diario*, 7-VI-1906).

<sup>8612</sup> hijo de Robustiano Patrón Escobar y de Francisca Costas Figueroa (Calvo, VI,

---

191), y cuñado del jurista José María Solá, quien había sido en un matrimonio anterior yerno del célebre político liberal salteño Isidoro López.

<sup>8613</sup> marido de Prelidiana Torino y López (Jáuregui Rueda, 1976, 134).

<sup>8614</sup> El gobernador Ovejero "...sabe que el Presidente del Senado Dr. Zerda, de la familia de Ovejero, entrará al gobierno para convocar a elecciones en el término constitucional perentorio de treinta (30) días. Sabe que el candidato oficial Dr. Linares, de la familia de Ovejero, será electo Gobernador gracias a la desorientación de las fuerzas independientes que no pueden estrechar filas en tan corto plazo con éxito probable. Y sabe, por fin, que el abnegado mandatario, eje y palanca de la política casera, tendrá con tan hábil combinación, asegurada su senaduría nacional por nueve (9) años que pronto dejará el Dr. Serrey" ("La Familia Salteña", *El Diario*, 12-X-1906).

<sup>8615</sup> hermano del Gobernador Miguel S. Ortiz Viola (GP.1881), del Diputado Nacional Abel B. Ortiz Viola (DN.1882-86), cuñado del Diputado Provincial Miguel A. Fleming Jáuregui; y primo y cuñado del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Alemán (SN. 1880-89).

<sup>8616</sup> "Política Salteña", *El Diario*, 4-VIII-1905.

<sup>8617</sup> "Política Salteña", *El Diario*, 4-VIII-1905.

<sup>8618</sup> "Política Salteña", *El Diario*, 4-VIII-1905.

<sup>8619</sup> Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortiz Santos y de Candelaria Viola Otero (Cornejo, 1983, 270). Hermano de los Diputados Nacionales Ignacio Ortiz Viola (DN.1886-90) y Abel Ortiz Viola (DN.1882-86), primo hermano del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Alemán (SN. 1880-89); cuñado del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04) y tío carnal del Juez Federal Martín Gómez Rincón (JF.1920/30-31) y del Diputado Nacional Abel Gómez Rincón (DN.1934-46).

<sup>8620</sup> Cornejo, 1983, 144.

<sup>8621</sup> *El Cívico* (Salta), órgano del partido radical de Salta, 2-X-1906, No. 4.225, cuya copia se halla en AGN, Intervención Federal, Leg.57.

<sup>8622</sup> Ibid.

<sup>8623</sup> Ibid.

<sup>8624</sup> Ibid.

<sup>8625</sup> Adolfo Valdés, David Michel Torino, Juan Patrón Costas, Juan B. Lacroix, Ricardo A. Torino, Andrés de Ugarriza, M. Torino Pintos, y Ramón B. Castro.

<sup>8626</sup> AGN, Intervención Federal, Leg.56.

<sup>8627</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.

- 
- <sup>8628</sup> Pío Urriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.
- <sup>8629</sup> probablemente hijo de Francisco J. Alsina.
- <sup>8630</sup> Pío Urriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.
- <sup>8631</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 20-IX-1912, p. 845.
- <sup>8632</sup> *Ibíd.*
- <sup>8633</sup> *Ibíd.*
- <sup>8634</sup> Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz y sobrino carnal del Diputado Provincial Marcos Figueroa (Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.394).
- <sup>8635</sup> "La Situación de Salta. Reportaje al Dr. Abraham Echazú", *El Diario*, 27-IV-1909.
- <sup>8636</sup> "La Situación de Salta. Reportaje al Dr. Abraham Echazú", *El Diario*, 27-IV-1909.
- <sup>8637</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.63, 29-I-1913, p.423.
- <sup>8638</sup> *Ibíd.*
- <sup>8639</sup> *Ibíd.*
- <sup>8640</sup> *Ibíd.*
- <sup>8641</sup> Jáuregui Rueda, 1976, 134.
- <sup>8642</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1913, p.423.
- <sup>8643</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Continuación de la 4a. Sesión Extraordinaria, 10-XI-1906, Reunión No.53, 983-993; y Serrey, 1945, III, 327.
- <sup>8644</sup> *Ibíd.*
- <sup>8645</sup> *Ibíd.*
- <sup>8646</sup> según Oyhanarte, el origen del rencor de Paz hacia su primo obedecía a que este último le había engañado ofreciéndole en su primera gestión la futura Presidencia de la República, pero cuando llegó el momento se la ofreció a su conuñado, y para él solo la Intendencia de Buenos Aires (Oyhanarte, 1932, 1988, 54).
- <sup>8647</sup> Díaz de Molina, 1979, 88.

---

<sup>8648</sup> Hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y hermano de los ex-Gobernadores de San Luis Toribio y Eriberto Mendoza (Díaz de Molina, 1979, 29; y Cutolo, IV, 538).

<sup>8649</sup> Díaz de Molina, 1979, 88.

<sup>8650</sup> nacido en 1841, hijo de Nabor Córdoba y de Ester Luna y Liendo, y casado con Mercedes Arias Guerra, había militado en el nacionalismo Mitrista en 1874 y 1880.

<sup>8651</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8652</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8653</sup> cuñado del Diputado Nacional Pedro Lacavera Cainzo (DN.1896-04), y concuñado del Senador Nacional Brígido Terán Silva (SN.1901-19).

<sup>8654</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8655</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8656</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8657</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8658</sup> hermano del Gobernador Eudoro Avellaneda Silva (GP.1872), del ex-Presidente Nicolás Avellaneda Silva; y primo hermano del Diputado Nacional Agustín de la Vega Silva Zavaleta (DN.1882-86).

<sup>8659</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8660</sup> concuñado del Vice-gobernador de Córdoba José Figueroa Alcorta, padre del Diputado Nacional Enrique Santillán Bouquet Roldán (DN.1932-36), y suegro del Diputado Nacional Fernando Prat Gay.

<sup>8661</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8662</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8663</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8664</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8665</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8666</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.

<sup>8667</sup> había sido Gerente de la sucursal del Banco Nacional. Era hijo natural del ex-Gobernador Celedonio Gutiérrez, cuñado del Gobernador de Santiago del Estero Absalón Rojas, y suegro del escritor y político radical Ricardo Rojas.

- 
- <sup>8668</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8669</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8670</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8671</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8672</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8673</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8674</sup> "La Intervención en Tucumán", *El Diario*, 29-IX-1905.
- <sup>8675</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8676</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905. En aquellas provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 3289/95) la oposición fué reclamando perentoriamente su actualización. El fraude censal consistía en no ajustar la representación parlamentaria a las cifras procedentes de los Censos de Población.
- <sup>8677</sup> "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", *El Diario*, 1-IX-1905.
- <sup>8678</sup> Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 184.
- <sup>8679</sup> "La Intervención en Tucumán", *El Diario*, 29-IX-1905.
- <sup>8680</sup> Dueño del Ingenio San José, hijo de Justiniano Frías Gramajo y de Clemencia Silva Zavaleta, y marido de Isolina Zavalía López. Era hermano del Diputado Nacional Raúl Frías Silva.
- <sup>8681</sup> Los opositores y las personas independientes que actuaban en Tucumán "...afirman que las familias Terán y Padilla se reparten a su antojo las posiciones políticas negando toda participación a los que carecen de esa sangre privilegiada. Así en la Legislatura de Tucumán, que debe designar al Senador Nacional, Don Brígido Terán cuenta con los siguientes parientes:
- En el Senado provincial:
- Emilio Terán, primo hermano;
  - Juan Manuel Terán, hermano;
  - Belisario Terán, primo hermano;
  - Ramón Paz Posse, sobrino;
  - Manuel Cossio, primo;
  - Ricardo Frías, primo hermano;
  - Luis Nougues, sobrino;
  - Gerónimo Helguera, sobrino;
- En la Cámara de Diputados local:
- Eudoro Avellaneda, sobrino carnal;
  - Julio Cainzo, marido de sobrina carnal;
  - Ezequiel Gallo, marido de sobrina carnal;

---

Aníbal Fagalde, empleado;  
José B. González, empleado;  
Gustavo Haurigot, empleado;  
Percy Hill, yerno;  
Juan C. Nougués, sobrino;  
León Nougués, sobrino;  
Brígido Terán, hijo;  
Julio Terán, sobrino;  
Juan B. Terán, sobrino.

Y esa lista de la Legislatura se corona con el parentesco que tiene el Sr. Terán con el Gobernador Frías Silva (*El Diario*, 23-X-1909).

<sup>8682</sup> Los que dentro y fuera de Tucumán combaten la política del nepotismo por considerarla funesta para la vida democrática, tienen, a juicio de *El Diario*, "...que aplaudir la resolución del Gobernador Frías Silva al negar ejercitar la influencia de que dispone, dentro de su partido para que no se reelija a dos congresales que son sus primos hermanos. Esto, aparte de otras cosas, es en el Dr. Frías Silva un rasgo de carácter, pues para decidir su actitud ha debido luchar con servir dificultades dentro de la familia oficial" ("Política Tucumana. La intromisión federal", *El Diario*, 28-X-1909). Pero dos meses más tarde, la situación en el seno de la familia oficialista se complica, por cuanto "...el lazo de parentesco parece que está muy debilitado...o por lo menos no es bastante fuerte como para impedir que el sobrino le falte el respeto al tío y aspire a la misma posición que él. Falta por lo visto la mano férrea de un patriarca que mantenga la disciplina y jerarquía familiares ("Reacción Tucumana", *El Diario*, 29-XII-1909). Y otros tres meses más tarde, *El Diario* revela que "...el gobierno de Tucumán está muerto moral y políticamente desde ese lamentable episodio de la senaduría nacional adjudicada con el auxilio de la fuerza pública, a un primo hermano y socio del Gobernador Frías Silva. Cuando este se oponía a la reelección de los Sres. Brígido Terán, Miguel Padilla y Julio Terán, decía precisamente, que no podía consentir se reeligiera bajo su gobierno a tres primos hermanos suyos, habiendo para el Senador Terán la circunstancia agravante de tener con él una sociedad comercial en el Ingenio Santa Lucía. Por estas razones tan decisivas, nadie discutió, en principio, la actitud del mandatario tucumano, sería o no estrictamente legítima su situación en el asunto, pero lo cierto es que era un ejemplo de moralidad política y una relevante prueba de carácter. Luego, afirmando esa actitud, el Dr. Frías Silva, declaró que su principal programa como hombre político era el conservar la unión del partido que lo había llevado al gobierno. En aras de ese propósito estaba resuelto a inmolar su propia posición en el gobierno. Y bien, este programa y aquella decisión han sido ejecutados al revés. El Gobernador de Tucumán se echó al río para conseguir las reelecciones de sus parientes y de su socio, persiguiendo cruelmente a los correligionarios que se negaban a seguir sus volteretas. El Dr. Frías Silva ha faltado de este modo a un solemne compromiso y ha cometido un acto incalificable en un hombre político, el de anarquizar un partido en beneficio de los adversarios. El Dr. Frías Silva, ha demostrado una ineptitud a toda prueba y ahora solo su vanidad que está en relación directa de aquella, le impide ver claro y seguir pronto el único camino que le queda: el de su casa. Allí, ante el espíritu tutelar de los antepasados, que él invocara al recibirse del gobierno, y ante la admiración de sus actuales parientes, seguirá creyendo que los tucumanos no están aún suficientemente preparados para aquilatar sus cualidades y con eso no hará mal a nadie" ("Política Tucumana. La nueva Legislatura", *El Diario*, 17-III-1910).

---

<sup>8683</sup> Hijo de Manuel José Padilla de la Puente, y de Josefa Nougués Romero, marido de Elvira Salvatierra Frías; y cuñado del Diputado Nacional Federico Helguera Molina (DN.1900-04).

<sup>8684</sup> La Comisión Directiva de la Unión Provincial quedó compuesta por: Joaquín Acuña, Gustavo Ferrari, Javier Castro, Federico Espeche, Guillermo Correa, y Teodulfo Castro.

<sup>8685</sup> Dicho manifiesto decía: "...Veinte mil Catamarqueños ausentes de sus hogares, las industrias agonizantes y el comercio próximo a extinguirse, han debido convencer a los hombres que nos gobiernan, que sus sistema liberticida, irrespetuoso de la opinión, indiferente a las desgracias que aniquilan a la provincia, y consagrado a servir el sensualismo de una familia, es mortal para el progreso y las instituciones que garantizan el ejercicio de la libertad civil y política. Denunciando el fraude o la malversación, ha premiado al culpable estimulando su delincuencia: reclamada la publicación de la inversión de la renta pública como lo ordena la Constitución Nacional, se ha encastillado en silencio sospechoso: muchos miles de pesos han desaparecido de las arcas ignorándose su destino. La campaña clama contra las confabulaciones de jueces, comisarios y receptores organizadas para la expoliación, el régimen judicial desprestigiado en su más alta jerarquía, no goza de la independencia que requiere sus funciones, porque sus miembros o siguen la suerte del Poder Ejecutivo de la familia o no se les abona sus sueldos, cadena con la que se ata y humilla la distribución de la justicia, el juicio político contra los funcionarios del estado revestido de inmunidades es imposible, porque la cámara que acusa, la que juzga, y el inculpado dependen exclusivamente del jefe del estado y de la familia, que toma sobre sí el juicio y la sentencia, haciendo inútil todo procedimiento, para la representación nacional no se consulta el mérito sino el parentesco (*La Nación*, 29-XII-1898).

<sup>8686</sup> *El Diario*, 24 y 25-IX-1899; y Bazán, 1992, 230-231. Para el periódico *El Diario*, el nepotismo estrecho es "...lo que dio origen a la sublevación general de la provincia, determinando el sangriento y estéril episodio de la revolución reciente --la cual ya no fue tan popular como debiera porque se puso al frente de esta reacción, con ojo vivaz de albatros que sabe cernirse sobre las tempestades, y utilizando su posición y vinculaciones nacionales, el Senador [Caracciolo] Figueroa, generador de la genealogía --el cual como un sañado y voraz Saturno de tierra adentro, devoraba sus hijos por que no habían sabido conducir las cosas de modo bastante acertado para asegurarle su reelección" (*El Diario*, 23-II-1900).

<sup>8687</sup> patrocinados por el Pellegrinismo.

<sup>8688</sup> Benjamín Figueroa a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1899, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.90.

<sup>8689</sup> primo hermano del Director de *El Diario* Manuel Láinez.

<sup>8690</sup> Sommariva, 1931, II, 298; y Olmos, 1967, 51.

<sup>8691</sup> *Ibidem*.

<sup>8692</sup> cuñado del industrial azucarero tucumano Clodomiro Hileret.

---

<sup>8693</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión ordinaria, 25-IX-1899, pp. 912 y 913.

<sup>8694</sup> primo hermano del Diputado Nacional Lídoro J. Avellaneda Villegas (DN. 1896-1900).

<sup>8695</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión Ordinaria, 25-IX-1899, p.911.

<sup>8696</sup> *Ibidem*.

<sup>8697</sup> Este concepto fué inaugurado en la República Oriental del Uruguay con el Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado entre Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (González, 1961, 86-94; y Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309). A su vez este Pacto estuvo influido por el ejemplo brindado en 1852 por el Acuerdo de San Nicolás, celebrado entre el Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros, y los Gobernadores Rosistas. Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, la fusión era "esencialmente institucional, es el anodamiento del régimen representativo, es la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan Carlos Gómez, *El Nacional* [Montevideo], 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 151).

<sup>8698</sup> Joaquín V. González a Julio A. Roca, La Rioja, 23-III-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.74).

<sup>8699</sup> M. de la Fuente a Julio A. Roca, La Rioja, 4-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

<sup>8700</sup> *Ibidem*.

<sup>8701</sup> hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien había descollado en la defensa de La Rioja contra el sitio del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa González, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro (Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era yerno del Gobernador Francisco Álvarez; tío del Diputado Nacional José María Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos; y primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera.

<sup>8702</sup> Era dueño de un área de 26 leguas de campo, "...los mejores que tiene la provincia, sobre las líneas férreas" (Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 18-IX-1892, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>8703</sup> Bazán, 1992, 221.

<sup>8704</sup> Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

---

<sup>8705</sup> Bazán, 1967, 652. Para *El Diario*, "...convencidos los ciudadanos de la inutilidad de sus esfuerzos, para oponerse a la intervención oficial, han abandonado el ejercicio de sus derechos, dejando que los gobernadores y sus adláteres manejen el mecanismo de hacer diputados y senadores, y renueven a su antojo el personal gubernativo. Esta falta de resistencia ha fomentado de tal manera los abusos, que ya los caudillejos provinciales prescinden de todas las formas para perpetuar su dominio, pasando de la gobernación al congreso, o vice-versa, con aposentaduras reservadas, que se hacen guardar por los parientes de menor cuantía en una combinación de casillero japonés. De la gobernación van al Senado, y mientras vuelven del Senado a la gobernación hay siempre un pariente, amigo o socio que manipula las gangas del terruño, de acuerdo con los intereses de la comandita" ("Revolución en La Rioja", *El Diario*, 24-V-1898).

<sup>8706</sup> A juicio de *El Diario*, la bandera de esta revolución "...no ha sido de reacción moral, no obstante las proclamas. Al acusar a Bustos se acusan a sí mismos, desde que ellos, en mayoría, han sido aliados y hasta protegidos del gobernador derrocado, han tenido más o menos, su participación en los hechos que constituyen el proceso de aquella situación. Se han alzado ahora contra Bustos, no para vengar ofensas inferidas a la opinión pública con el entronizamiento de prácticas abusivas o vergonzosas, sino para vengar sus propios agravios y con la idea de restablecer el derecho a vivir del presupuesto que sus amigos y la jefatura central les desconocen" ("La Revolución Riojana", *El Diario*, 26-V-1898).

<sup>8707</sup> Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 14-VI-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.78). Sin embargo, *El Diario* opinaba lo contrario, pues "...lo han derrocado sin esfuerzo, al primer empujón, y se ha caído como se caen esos árboles del Chaco, aparentemente robustos pero sin raíces, y cuyo derrumbe no conmueve nada, pues si algo arrastra es hojarasca tendida a flor de tierra" ("Caudillos inválidos", *El Diario*, 28-V-1898)..

<sup>8708</sup> según Guillermo San Román, Joaquín V. González soñaba no sólo en ser Diputado al Congreso Nacional, "...sino dejar un sucesor de su familia política [Leónidas Carreño], que continúe devorando los últimos despojos de este cadáver, que se llama gobierno de La Rioja" (Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 20-IX-1891, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>8709</sup> Eriberto Mendoza y Jacinto Videla a Julio A. Roca, San Luis, 12-XII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.73).

<sup>8710</sup> Nacido en 1852, hijo de Faustino Berrondo y de Angela Aberastain (Cutolo, I, 438).

<sup>8711</sup> Hijo de José de la Cruz Videla y de Margarita Poblet, y casado con Ercilia Bengolea. Era medio primo hermano del Dr. Teófilo Sáa (Cutolo, VII, 607).

<sup>8712</sup> yerno del Senador Nacional Juan A. Barbeito Giménez, (SN.1892-01) (Fuente: Barreiro Ortiz, 1967, 165). Una vez que renunció al Ministerio denunció públicamente la conducta del Gobernador Berrondo.

<sup>8713</sup> Eriberto Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 28-II-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.74).

---

<sup>8714</sup> Jacinto Videla a Julio A. Roca, San Luis, 30-VII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.79).

<sup>8715</sup> suegro del Diputado Nacional Víctor S. Guiñazú Ortiz (DN. 1892-96); y primo político del Gobernador y Diputado Nacional Estéban P. Adaro Quiroga (GP.1907-09; y DN.1924-28).

<sup>8716</sup> Eriberto Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 27-I-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>8717</sup> *Ibidem*.

<sup>8718</sup> *Ibidem*.

<sup>8719</sup> *Ibidem*.

<sup>8720</sup> *Ibidem*.

<sup>8721</sup> hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y marido de Aurora Reboyras (Calvo, IV, 538). Los Lucero eran descendientes del Gobernador Coronel Pablo Lucero, quien gobernara a San Luis en las postrimerías del régimen rosista.

<sup>8722</sup> cuñado del Gobernador Dr. Toribio Mendoza Lucero (GP.1878-81).

<sup>8723</sup> "...Veinticinco años de dominio de una familia debe cansar a un pueblo y más si ese pueblo es reducido" (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 12a Sesión ordinaria, 16-VI-1904, p.110). La elección de Gobernador se efectuaba en San Luis "...al revés tendiendo cada vez mas a encerrarse en un círculo de familia, hasta el extremo de que los dos últimos gobernadores fueran respectivamente cuñado y hermano del Senador Mendoza. El partido en estas condiciones no podía mantenerse en el equilibrio que exige el gobierno, como si se hubiera intentado mantener de pie una pirámide invertida. Esta inversión de los términos ha causado la subversión que comentamos bajo su faz moral, sin negar naturalmente nada de su prestigio efectivo al jefe político de esa situación. Tenerlo, es evidente que lo posee, habiéndolo demostrado en actos electorales de verdad: pero esto mismo envuelve un concepto negativo" (*El Diario*, 14-VI-1904). Para *El Diario*, "...dada la escasa fuerza de que los gobiernos provinciales disponen en sus policías, cualquier grupo es apto para asaltar el poder, sin que su triunfo material signifique gran cosa; pero por lo mismo que las situaciones se mantienen sobre un concepto puramente moral, su subsistencia es casi siempre prueba de su carácter tolerable, cuando falta el apoyo es porque la moral política ha descendido" (El Diario, 14-VI-1904). En realidad, para El Diario, "...no ha habido allá ninguna tentativa de regeneración en el alto sentido de la palabra, sino un estallido por exceso de tensión: pues los cabecillas del movimiento, cuyo jefe principal resulta ser un ex-Diputado, formaron parte del sistema que ahora intentan derribar como un oprobio" ("Revolución en San Luis. Libertad del Senador Mendoza y del Diputado Gutiérrez", *El Diario*, 14-VI-1906).

<sup>8724</sup> Sommariva, 1931, II, 309; y Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 183.

<sup>8725</sup> Beazley a Julio A. Roca, San Luis, 28-VI-1904 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

---

<sup>8726</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>8727</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>8728</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>8729</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>8730</sup> los Quiroga, Ojeda, Tissera, Olguín, Pastor, Vidal, Guiñazú (*El Diario*, 13-VIII-1906).

<sup>8731</sup> hijo del Coronel Carlos Juan Rodriguez y de Demófila Jurado, y marido de Josefa Ercilia Ortiz Estrada. Era cuñado de los Gobernadores Adolfo Rodríguez Saa y Juan Agustín Ortiz Estrada (Cutolo, VI, 322).

<sup>8732</sup> El Senador Línor Quiroga no había perdido las mañas, pues a juicio de Eriberto Mendoza, puso todo su empeño "...en que la oposición proclamase candidato a Gobernador un amigo suyo lo que no ha conseguido, aceptando por fin un candidato revolucionario el rengo [Benigno] Rodríguez Jurado, que es Pellegrinista" (E. Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>8733</sup> Este grupo de hombres "...vió muy pronto con dolor que la nave del gobierno seguía por rumbos que no estaban de acuerdo con sus ideales, cuales eran hacer un gobierno constitucional, honrado, laborioso y justiciero, y no queriendo ser cómplice ni cargar con la responsabilidad ante el pueblo que les acompañó, se retiraron, viendo sus esfuerzos esterilizados" (*El Diario*, 13-VIII-1906).

<sup>8734</sup> "...porque a decir verdad, son los únicos que lo forman, y no estaría quizás muy lejos el momento en que se simplificará todavía mas la palabra. Faltándole ese contingente más importante a este gobierno, no teniendo apoyo ante el gobierno nacional, desprestigiado ante el pueblo por las iniquidades sin cuento que se ven a cada paso, es un cuerpo anémico que se revuelca en los estertores de una larga y penosa agonía, que a estar a la frase del creyente; muchos y grandes deben ser los pecados!. La Unión Provincial falleció, no existe, y el gobierno tambalea envuelto en la mortaja que le hicieron los que primero le prestaron su concurso, y es opinión que se ha hecho carne en el pueblo, que no está lejos el día en que irá a la tumba" (*El Diario*, 13-VIII-1906). Zavala fue legislador, constituyente y un prolífico periodista, fundador de "*El Progreso*", nacido en Renca en 1878, y marido de Felisa Rodríguez Jurado (Cutolo, VII, 784).

<sup>8735</sup> De ahí el nombre de "motineros" con que se los conoce en San Luis.

<sup>8736</sup> Producido el motín, confesaron al Ministerio del Interior el móvil profundo de su sensualismo político: "...tenemos que responder a la necesidad de nuestros amigos políticos. Necesitamos puestos" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 30-IX-1928, p. 871).

---

<sup>8737</sup> Melo, 1964, 109.

<sup>8738</sup> El Gobernador Leiva fue elegido por el Interventor José Vicente Zapata. En este sentido, según *El Diario*, "...es el único Gobernador de Santa Fé que no ha sido elegido por el Gobernador su antecesor. No hay, desde Estanislao López hasta hoy día, un sólo ejemplo que sea una nota discordante. Así, para destruir la oposición o mantenerla impotente, ha sido necesario armar al Gobierno con poderes excepcionales en la Constitución y leyes de la provincia, y cuando ella no alcanza, el presidente se encarga de atarles las manos con la tropa de línea" ("La Política en Santa Fé", *El Diario*, 29-XII-1897).

<sup>8739</sup> Se preguntaba *El Diario*, "...¿como es posible que estando el Colegio Electoral casi totalmente en contra de Iturraspe, tenga que elegir forzosamente a Iturraspe? ¿porque no elige a Gálvez, a Cabral o a cualquier otro?. La razón es breve y sencilla. Elegir un Gobernante que no sea Iturraspe es fácil, lo que es imposible al círculo es construir una situación con sus sóloas fuerzas. Cualquiera que sea el ungido para el Colegio necesita con necesidad de vida, el concurso inmediato y eficaz del presidente, en forma de batallones de línea y otros elementos de fuerza. Sin eso no hay gobierno o mejor dicho, unos cuantos locos darían cuenta de él. Iturraspe cuenta con Roca. Voilà la question" ("La Política en Santa Fé", *El Diario*, 29-XII-1897). Para *El Diario*, Iturraspe "...entra al gobierno como un cautivo del P.A.N. santafesino, y ya sea con los Galvistas o con los Leivistas, su gobernación tendrá que subordinarse a la tutela política de uno de ellos; empezará por cortejar a las dos y pudiendo mantener el equilibrio entre las pretensiones de esas fracciones, se entregará al fin en brazos de la que le ofrezca más cómodo y blando apoyo" ("La Gobernación Santafesina", *El Diario*, 16 y 17 de Enero de 1898).

<sup>8740</sup> hijo de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno, casó cuatro veces, la primera con Clara Cabot, la segunda con Sofía Maurer, la tercera con Ana Sieber, y la cuarta con Dominga Cullen Iturraspe, viuda de Emilio Cabal y Gonsález (Calvo, II, 36).

<sup>8741</sup> Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>8742</sup> nacido en Buenos Aires en 1852, hijo de Juan Lorenzo Cafferata y de Francisca Silveyra, y marido de Adela Garzón y Vázquez de Maceda (Cutolo, I, 41). Fué padre del Diputado Nacional Juan F. Cafferata Garzón.

<sup>8743</sup> hijo del Diputado Nacional Pascual Rosas Gonsález (DN.1870-74) y suegro del Diputado Nacional Luis Lamas (DN.1904-08).

<sup>8744</sup> Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>8745</sup> El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo un cortejo de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (*La Prensa*, 7 y 9-XII-1897; y *El Diario*, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-10).

---

<sup>8746</sup> J. B. Iturraspe a Luis A. Sauze, Santa Fé, 9-XII-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

<sup>8747</sup> J. B. Iturraspe a Julio A. Roca, Santa Fé, 8-I-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

<sup>8748</sup> Para El Diario, la posición de Iturraspe "...no puede ser más inestable; si se inclina a un costado, lo tiran del otro; y si avanza, los dos círculos que lo flanquean lo van a descomponer; no le queda, pues en los conflictos que lo amenazan, mas que una salida de retroceso, y no pudiendo avanzar ni converger, su escapatoria es una retirada, una eliminación. Un gobernador que fuera un hombre político podría operar con estrategia, despejando sus flancos y desembarazándose de los elementos que lo acompañan como a una rémora, pero como decimos, no le vemos laya al Sr. Iturraspe para desembolverse en una política que a la firmeza de propósito requiere el tacto de la manipulación" ("Santa Fé. Su flamante gobierno", *El Diario*, 19-II-1898).

<sup>8749</sup> Para *La Nación*, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard, quien a su vez era cliente político de Rodolfo Freyre, yerno de Iturraspe y candidato a sucederlo. Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fue objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", *La Prensa*, 17-XI-1901; y exposición del Senador Nacional Carlos Pellegrini, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 12a. Sesión de Prórroga, 14-XI-1901, pp.455-459).

<sup>8750</sup> padre del Diputado Nacional Benigno Martínez Perichón (DN.1906-10; 1920-24).

<sup>8751</sup> vr Castello, 1991, cap.XIII.

<sup>8752</sup> "Los Sucesos de La Cruz", El Diario, 12-I-1909, p.3; y Castello, 1991, 508.

<sup>8753</sup> "Conflictos de Lealtad", El Diario, 13-I-1909.

<sup>8754</sup> "Conflictos de Lealtad", El Diario, 13-I-1909.

<sup>8755</sup> hijo de Nicolás Severo Isasmendi y yerno de Francisco J. Ortiz.

<sup>8756</sup> David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.102).

<sup>8757</sup> David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.102).

<sup>8758</sup> David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.102).

<sup>8759</sup> David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch.

---

Roca, Leg.102).

<sup>8760</sup> Antonino Díaz a J. Roca, Salta, 3-XII-1897 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76).

<sup>8761</sup> hijo de Facundo López Figueroa y de Juana Cornejo Figueroa; primo político del Gobernador Antonino Díaz Ibarguren (GP.1896); y tío político del Gobernador Julio Cornejo Ceballos (GP.1928-30).

<sup>8762</sup> presumo se trata de Juan Pedro Adrián Cornejo, hijo del segundo matrimonio de Juan Nepomuceno Cornejo Usandivaras, propietario del Ingenio San Isidro, y de Hortensia Valdés Gorostiaga; marido de Jacoba Isasmendi; y cuñado del Dr. Rafael Usandivaras.

<sup>8763</sup> Juez de Comercio de Salta (Cornejo, 1983, 121-122).

<sup>8764</sup> hijo del Senador Nacional Juan de Dios Usandivaras y San Millán (SN.1854-57).

<sup>8765</sup> hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de Mercedes Aráoz Figueroa, y casado con su sobrina Damiana Echazú Figueroa, hermana del Dr. Abraham Echazú. El Dr. Ricardo Pío Figueroa era asimismo sobrino carnal del caudillo Coronel Alejandro Figueroa Goyechea.

<sup>8766</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>8767</sup> *Ibidem*.

<sup>8768</sup> constituídos por los primos hermanos Ortiz Alemán y Ortiz Viola.

<sup>8769</sup> Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 2-V-1896 (Publicaciones del Museo Roca, Documento VII (Buenos Aires, 1967)

<sup>8770</sup> Hijo del Coronel Angel Mariano Zerda y Urristi, y de su primera esposa Fabiana Medina. Casó con Prediliana Torino y López (Jáuregui Rueda, 1976, 134). Era tío en segundo grado del que fuera Gobernador Avelino Figueroa Ovejero.

<sup>8771</sup> hijo de Carmen Pío Usandivaras y Servanda Zerda, contrajo primeras nupcias en 1878 con María Figueroa Paz, y segundas nupcias en 1895 con Angela Sánchez Isasmendi (Calvo, II, 363).

<sup>8772</sup> hijo de Manuel Ovejero y de Saturnina Zerda y Medina, sobrino del Gobernador Sixto Ovejero, y marido de Dolores Linares Usandivaras. Era cuñado del Gobernador de Salta Luis Linares Usandivaras, y primo hermano de los Gobernadores de Salta David Ovejero González y Avelino Figueroa Ovejero y del Gobernador de Jujuy Daniel Ovejero Tezanos.

<sup>8773</sup> Formado por los Diputados Felipe y Darío Arias Royo y Carlos y Flavio Arias Romero, y vinculado al clan de los Figueroa. En opinión de Ovejero, el Dr. Felipe Arias Royo "...es el que determina el rumbo de los 101 personajes de esta familia" (Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-1892, AGN, Archivo Roca, Leg.66).

- 
- <sup>8774</sup> Fernández Lalanne, 1989, 98.
- <sup>8775</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8776</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8777</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8778</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8779</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8780</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8781</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8782</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894). Y Muñóz debería haber agregado los casos de Bolivia y Chile. Para el caso de Bolivia, ver Canelas López, 1983; e Irurozqui y Peralta, 1998. Y para el caso chileno y el golpe de estado contra Balmaceda, ver Bravo Valdivieso, Bulnes Serrano; y Vial Correa, 1991. Para una historiografía sobre la revolución de 1891 contra Balmaceda, ver Blakemore, 1965.
- <sup>8783</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8784</sup> Dictadura Militar (*El Municipio*, 16-X-1894).
- <sup>8785</sup> De María, 1883-1887; Moreno, 1925; Herrera, 1941; Fonseca, 1946; y Magariños de Mello, 1952.
- <sup>8786</sup> Gallo y Cortés Conde, 1972, 72.
- <sup>8787</sup> ver Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988.
- <sup>8788</sup> en el seno de legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y provinciales.
- <sup>8789</sup> Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977, 1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y Cragnolino, 1986-87.
- <sup>8790</sup> Sagarna, 1943; Spalding, 1972; Argacha, 1979; y Saguier, 1996a.
- <sup>8791</sup> ver Saguier, 1995f.
- <sup>8792</sup> García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d.
- <sup>8793</sup> Saguier, 1996b.
- <sup>8794</sup> ver Little, 1980 y 1985; Ciafardo, 1990 y 1994; y Mead, 1997.
- <sup>8795</sup> Rapaport, 1962, 73. Sobre la Guardia Pretoriana en la antigua Roma, ver Rankov, 1995.
- <sup>8796</sup> Meeks, 1981, 172; y Windschuttle, 1997. Sobre Gibbon y el pretorianismo, ver Howard, 1994, y Leinweber, 2001. Sobre Samuel Pufendorf y la Teoría de los Cuatro Estadios, en Hont, 1985. Para una teoría de la evolución dialéctica de civilizaciones, imperios y guerras, ver Eckhardt, 1995. Para una aproximación evolucionista al problema de la periodización y a la historia del sistema mundial, ver Modelski, 2000. Para el pretorianismo periférico en una perspectiva

---

cliométrica, ver Kowalewski, 1991.

<sup>8797</sup> Finer, 1962, 86-87.

<sup>8798</sup> Ver Peruzzotti, 2004, 98.

<sup>8799</sup> Keck, 2005, 83.

<sup>8800</sup> Para una crítica de la teoría del estado pretoriano de Perlmutter, ver Welty (1998).

<sup>8801</sup> Ver Irwin, 2001.

<sup>8802</sup> Ver Borges, 1992; Forjaz, 1989 y Wirth, 1995.

<sup>8803</sup> ver Huntington, 1968, 198-237, citado en Montúfar, 1999.

<sup>8804</sup> Para una Nueva historia militar brasilera, ver Castro; Izecksohn: y Kraay, 2004

<sup>8805</sup> Perlmutter, 1982, 240.

<sup>8806</sup> Perlmutter, 1982, 249.

<sup>8807</sup> Posteriormente, luego del suicidio de Alem, Hipólito Yrigoyen incorporó a su discurso político pensamientos proféticos extraídos del credo Krausista (ver Roig, 1969). Sobre los elementos proféticos en las revoluciones puritanas, jacobinas, bolcheviques y jihadistas, ver Walzer, 1982.

<sup>8808</sup> El Boletín del Estado Mayor General del Ejército me fue permitido fotografiar merced a la generosidad de mi colega Juan Méndez Avellaneda, quien provisto de su cámara digital tuvo el acierto de reproducir el ejemplar más antiguo de dicha preciosa fuente documental, existente en la Biblioteca del Estado Mayor. También debo una valiosa información al Teniente de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo, del Archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La Foja de Servicios es una valiosísima fuente documental, por cuanto es muy heterogénea, pudiendo encontrarse en la misma antecedentes personales, sumarios, reglamentos, y trámites de altas y bajas, calificaciones, ascensos, enfermedades, incidentes, viajes, y retiros y pensiones.

<sup>8809</sup> Sobre el estado burocrático-patrimonial, ver Weber, 1944, II, 1019, 1022 y 1023. Para los caudillos como agentes del orden social, ver Real, 1957; Wolf y Hansen, 1967; Beezley, 1969; Lynch, 1987; y Halperín Donghi, 1989.

<sup>8810</sup> La milicia cívica tiene una vieja raigambre en la modernidad temprana renacentista, pues por ella batallaron tanto Maquiavelo como Savonarola, Salamonio y Guicciardini, opuestos a los ejércitos mercenarios (Skinner, 1985, I, 155, 172-175 y 198)

<sup>8811</sup> "Dos Puntos de Vista sobre un tema vital", en **Esto Es** (Buenos Aires), n.31, del 31 de junio de 1954.

<sup>8812</sup> Martínez, 1890, citado en Oszlak, 2004, 110.

<sup>8813</sup> Sobre la milicia ciudadana en la Revolución Americana (1776), ver Cunliffe, 1968; Kohn, 1975; y Mahon, 1983. En Alemania, la guardia nacional era denominada Landwehr (ver Holborn, 1968, 49 y 79)

<sup>8814</sup> Fuente: El Meeting y la guardia nacional, **El Tiempo**, 24-VII-1897.

---

<sup>8815</sup> ver Halperín Donghi, 1978.

<sup>8816</sup> Puede resultar ilustrativo al respecto, el recuerdo de las ideas que se vertieron a principios de 1822, en ocasión de discutirse en la Legislatura Bonaerense el mecanismo para el reclutamiento de soldados destinados a la formación de las milicias provinciales. El debate se originó al tratar el proyecto de ley presentado por el gobierno que proponía el alistamiento voluntario y, en caso de insuficiencia de hombres, la formación de contingentes. Era habitual durante esa época "...destinar a los servicios de frontera contra los indios, a los llamados vagos que no tenían ocupación comprobada. En el transcurso del debate el representante Rivas sostuvo que en primer lugar se debía incorporar al servicio de las armas a "los vagos y mal entretenidos". Intervinieron algunos oradores y quedó en el ánimo de la Sala el consenso de que, efectivamente, había que alistar a "esa porción de hombres perjudiciales, sobre quienes debía recaer primero esta carga personal, y ocurrir a los vecinos honrados y de ejercicio, solamente en caso de no poder llenar las necesidades del Estado con los primeros". Pero se hizo la expresa salvedad de que no se admitirán criminales en sus filas y el artículo respectivo quedó con el agregado importante: "se fijen en aquellos vagos a cuya repartición no manche un feo crimen". A continuación, pidió la palabra el Ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, para rebatir este criterio, porque de ese modo "no se hacía mas que manchar la ley, produciendo una desmoralización pública que debía precaverle el legislador, y haciendo huir del servicio militar a los honrados para darse lugar en él expresamente a los vagos y mal entretenidos". Y agregó que "el primer objeto del gobierno era de sacar todas las instituciones de ese estado de abyección con que las había caracterizado el gobierno tiránico". El ejército no debía ser formado por hombres cuya norma de conducta fuere el servilismo, ni tuvieran más estímulo que el temor. La Sala decía que la importancia del soldado "estaba en razón inversa de su servilidad; por consiguiente, que el soldado menos servil, sería el más valiente". Añadió Rivadavia que para incrementar las virtudes ciudadanas en los hombres de armas, era indispensable proporcionar los estímulos capaces de crear ese honor deseado y eliminar todo aquello que había producido su degradación durante gobiernos opresores. Debíase bregar por inculcar un sentido ético y el honor que significaba defender la Patria. Estas palabras del ministro de Gobierno del general Martín Rodríguez y futuro primer presidente de los argentinos, son un vigente punto de partida para la selección y educación de los integrantes del brazo armado de la Nación" (Fuente: **La Razón**-26-IX-1985).

<sup>8817</sup> Scobie, 1964; y Nellar, 1972, I, 497-505. Sobre la Guardia Nacional de Buenos Aires, ver Allende, 1954. Al producirse el sitio de Hilario Lagos en 1852 y ante el temor de un asalto a Buenos Aires, los inmigrantes españoles, suizos, alemanes, e italianos formaron cuerpos defensores de Buenos Aires, como la legión española que alcanzó un número de 377 voluntarios en armas. Sobre las Legiones Italianas en la defensa de Buenos Aires, ver Caronti, 1907; Arias Divito, 1999; y Alonso y Peña, 2004. Sobre Silvino Olivieri, la Legión Valiente y la fundación de la Nueva Roma, ver Frigerio, 1989. Medio siglo más tarde, ante la amenaza de guerra con Chile, la comunidad italiana prometía colaborar con nuevas legiones, ver Rock, 2006, 268.

<sup>8818</sup> Sobre la Guardia Nacional en Tucumán, Argentina (1850-1880), ver Macías, 2001.

<sup>8819</sup> Sobre la derrota de Mitre en La Verde (Setiembre de 1874), ver

---

Mármol, 1876 y Scenna, 1974. Y sobre la derrota de Tejedor en Barracas, Puente Alsina y Los Corrales, ver Gutiérrez, 1959.

<sup>8820</sup> Nellar, 1972, II, 377.

<sup>8821</sup> El director de la academia de guardias nacionales, coronel Rohde, dispuso en abril de 1896 "...que los jefes y oficiales alumnos se alternen en las conferencias que se dictan. Anoche disertó de las secciones 1ª y 2ª, sobre leyes de la guerra, el Dr. Alfonso Durno, y en las 3ª y 4ª sobre Delitos militares y sus penas los capitanes Luis María Campos y Alejandro Rodas. Los conferenciantes han sabido mantener el interés y la atención del auditorio. Esta es una medida que despierta en todos la emulación y el estudio" (*El Diario*, 7-IV-1896) Y en abril de 1896 el capitán de ingenieros Martín Rodríguez dio "...en el Colegio Nacional una corta conferencia a los subtenientes pertenecientes a la sección 18, sobre el origen de las distintas formaciones de combate que, desde la época de los griegos y romanos se han ido sucediendo progresivamente a medida que el poder ofensivo del arma era mayor, hasta llegar a la época de la edad media en que el infante pasó a ser elemento de segundo orden; con la aparición de los famosos caballeros combatientes, cuya presencia en la guerra, fue más motivo de tela para la tradición, siendo muy en breve reemplazados por el infante, de cuya eficacia como elemento de guerra, ha hecho grandes y entusiastas elogios el célebre Napoleón I (*El Diario*, 10-IV-1896). Para promover la emulación el medio idóneo era el de instituir conferencias doctrinales teóricas y prácticas; "...mas no a manera de congresillos de retóricos, para ver quien resulta victorioso en un torneo de habilidades y argucias bizantinas, y cual es el colega a quien se le infiere una herida en su reputación o en su amor propio —luchas mezquinas que envenenan el ambiente con la ponzoña de los ejemplos corruptores— sino exposiciones sensibles de ideas y de procedimientos, presentación de lecciones-modelos, consultas sinceras sobre la eficacia de nuevos recursos pedagógicos, y en fin, toda una obra de cooperación solícita y generosa entre los miembros de un personal que tiene derecho a elevar considerablemente su nivel intelectual y moral y la dignidad de sus funciones" (*El Tiempo*, lunes 2 de mayo de 1898)

<sup>8822</sup> Hay idea de formar un cuerpo de ingenieros de milicia ciudadana con personal elegido de aquellos oficios que tienen analogía con el servicio de institución, como ser mecánicos, albañiles, herreros, carpinteros, etc., confiando el mando principal a un jefe técnico del ejército de línea y la instrucción a oficiales de la misma clase, en número proporcional al de milicianos, debiendo ser estos, ingenieros diplomados en las facultades nacionales (*El Diario*, 3-III-1896)

<sup>8823</sup> Según el periódico *El Diario*, se ha fustigado "...el sistema de la instrucción doctrinal, arguyendo que más valdría una instrucción continuada durante quince días, pero los que tal sostienen se olvidan que la instrucción doctrinal, no irroga los gastos que originaría una movilización por quince días y que esta causaría mayores perjuicios a los ciudadanos. El sistema de la instrucción doctrinal es el que más se armoniza con la índole de nuestro pueblo, y ha sido el que desde el año 1826, época en que lo inauguró el Presidente Rivadavia, se ha venido empleando, con intermitencias, hasta que ha sido establecido por ley" (*El Diario*, 5-IX-1896).

<sup>8824</sup> En la marcha de toma de posesión de un terreno en Villa Devoto, destinado para los ejercicios de los regimientos 8 y 11 de infantería de Guardias Nacionales, se pudo comprobar "...el resultado poco satisfactorio en la elección del mencionado paraje, debido a su situación tan retirada, que dio por resultado que la tropa se sintiera fatigada al llegar al punto de reunión. Además, la tropa y oficialidad del regimiento 11, ha tenido de regreso, después de haber contramarchado y roto filas en la plaza de Flores, que venirse a pie hasta la plaza 11 de Septiembre, por la escasez de tranvías y falta de horario de los trenes" (*El Diario*, lunes 7 de septiembre de 1896).

<sup>8825</sup> Están muy alarmados los ciudadanos que forman el regimiento 4º de guardias nacionales, por el fanatismo religioso que, los ejercicios doctrinales, han venido a despertar en el jefe del regimiento. Misa tras misa, oyen los domingos y al paso que van, es seguro que el día de la movilización ha de exigir el jefe que cada soldado lleve dentro de la mochila algún santo de su devoción para... perder el tiempo en los momentos difíciles. Lástima grande es, que, por mera haraganería, los santos no intervengan hoy día como antaño, en las luchas de los ejércitos, pues de seguro, que el tiempo perdido en rezar, lo ganaríamos con creces el día de la batalla. Nos permitimos recordarle al jefe de la brigada sur, que nuestra religión dice: ayúdate que Dios te ayudará y que enseñe primero a maniobrar y a tirar al blanco y después, mucho después, a rezar, y hasta ayudar a misa si así lo cree oportuno (*El Tiempo*, 23-VIII-1895)

---

<sup>8826</sup> Pretender desvirtuar el hermoso movimiento patriótico que conmueve al país entero, en previsión de una guerra internacional que es casi imposible de evitar; cuando todos los ciudadanos se disputan a porfía por sacrificarse por la patria; cuando corren a los batallones para instruirse en la táctica y claman por polígonos de tiro para ejercitarse en el manejo de la nueva arma de guerra, desconocida de todos, pero con la cual tendrán mañana que defender el honor y los intereses de la patria en tan solemne situación, cuando la crítica ha enmudecido y los partidos políticos han callado, un funcionario de criterio estrecho aparenta no ver en todo eso mas que una maniobra política, y cree que se quiere constituir un poder militar rival del gobierno...j (*El Tiempo*, 27-VI-1895)

<sup>8827</sup> En la instrucción, para aproximarse en lo posible al tiro de guerra, era preciso según la redacción de *El Tiempo*, en polémica con el periódico *El Diario*: 1º Que los campos de tiros tengan blancos fijos, movibles y de eclipse con los cuales se puedan simular los movimientos de tropas enemigas, tales como líneas de infantería, baterías o líneas de caballería, en posición, y en marcha para los cambios de objetivo; líneas de infantería a eclipse que surjan y desaparezcan a voluntad y líneas de infantería y caballería movibles para el tiro contra las tropas que estén en marcha. Los objetivos deben satisfacer a las condiciones siguientes: Tener la mayor semejanza con los objetivos reales, ser de fácil transporte, y prestarse para una instalación rápida y cómoda en caso de que no puedan instalarse permanentemente, los objetivos en el campo de tiro. 2º Es preciso disponer de abrigos para los hombres que manejan los objetivos y de una red telefónica que ponga en comunicación al director del campo, con los hombres que están en los abrigos. Estos abrigos son de diferentes tipos y recuerdo haber visto en el campo de Chalcán uno en forma de bóveda que dio muy buenos resultados” (*El Tiempo*, 22-VI-1895).

<sup>8828</sup> La concurrencia al meeting del 26 de julio de 1897, “...es un deber político altísimo, sin duda, pero completamente político. La bandera que se sostuvo en el Parque y que hoy flamea a la cabeza de los buenos elementos que se aprestan a emprender una nueva cruzada cívica, no simbolizó jamás la negación de los deberes para con la patria, antes fue su brillante y enérgica confirmación. El mejor modo de conmemorar el cumplimiento del deber cívico por el cual se sacrificaron los héroes de Julio, es cumplir con los deberes análogos. Los guardias nacionales que no puedan asistir, por la coincidencia de la manifestación popular con los ejercicios doctrinales, pueden estar contentos de tener tan buena disculpa. Los que vamos a asistir mañana a la conmemoración, nos llamamos Mitristas o Radicales. Pero los que deben asistir a los ejercicios, se llaman todos argentinos. Y la diferencia es fácil de establecer. Y al meeting es un deber de leales partidarios. Asistir a los ejercicios, es una obligación de buenos patriotas”. (Fuente: El Meeting y la guardia nacional, *El Tiempo*, 24-VII-1897)

<sup>8829</sup> *El Tiempo* hizo presente la necesidad que había “...de tomar alguna medida que cortara el abuso que venían cometiendo numerosos jóvenes de esta capital, quienes para evitar los ejercicios doctrinales, se enrolaban en la guardia nacional de la provincia, presentándose al efecto a los comandantes militares de los pueblos cercanos, como ser Lomas de Zamora, Quilmes, Barracas, etc”. (*El Tiempo*, 17-IV-1895)

<sup>8830</sup> Acontece lo siguiente: que los extranjeros, para escapar a las incomodidades que podrán sobrevenirles con motivo de las próximas instrucciones a la guardia nacional, si no están munidos de los comprobantes que los exceptúan de cumplir con las obligaciones del ciudadano, --para esquivar decíamos a esos deberes--acuden en tropel a proveerse en los consulados respectivos de la carta o documento que los acredita como ciudadanos de otras naciones (*El Tiempo*, 7-III-1895)

<sup>8831</sup> En mayo de 1898, Se trató de concentrar antes del 25 de mayo, durante tres días, 50.000 guardias nacionales, conjuntamente con algunas divisiones del ejército de línea. Vendrían a acampar en los alrededores de esta ciudad, las divisiones del Tandil, Centro y Litoral, de guardias nacionales de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, y el día patrio las fuerzas desfilarían por la plaza Victoria, en una grandiosa manifestación de nuestra fuerza y de nuestro poder. El objeto práctico de tal movimiento, es probar de una vez por todas, el servicio de transporte ferroviario, de administración y de sanidad, todo lo cual traería enseñanzas provechosas” (*El Tiempo*, miércoles 4 de mayo de 1898).

<sup>8832</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (*El Municipio*, 21-III-1895).

<sup>8833</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (*El Municipio*, 21-

---

III-1895).

<sup>8834</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8835</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8836</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8837</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8838</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8839</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8840</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8841</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8842</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8843</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8844</sup> La Guardia Nacional y las Asociaciones de Tiro (***El Municipio***, 21-III-1895).

<sup>8845</sup> art. 1º de la Ley de 27 de mayo de 1865.

<sup>8846</sup> Art. 20, de la Ley de reclutamiento, de 28 de septiembre de 1872 (Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, ***El Tiempo***, 3 de agosto de 1895).

<sup>8847</sup> Miles de ciudadanos poco afectos a las molestias de la vida militar, "...se decidieron a trocar la libertad del soltero por el yugo matrimonial, con gran contento de las condenadas a ser suegras. Con la sanción de ayer, desde que el matrimonio no les exime del servicio activo, nadie querrá casarse, para no exponerse a que en plena luna de miel se le obligue a trocar por la carpa de campaña su hogar de formación, además de las mil contingencias de la ausencia" (***El Tiempo***, 26 de septiembre de 1895)

<sup>8848</sup> Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, ***El Tiempo***, 3 de agosto de 1895.

<sup>8849</sup> Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, ***El Tiempo***, 3 de agosto de 1895.

<sup>8850</sup> La Guardia Nacional. Su organización-Academias militares (***El Tiempo***, 5 de febrero de 1895)

<sup>8851</sup> El periódico ***El Diario*** había hecho varias observaciones y "...formulado algunas denuncias sobre el 2º regimiento de guardias nacionales, citando el nombre de su segundo jefe teniente coronel César Aguirre, porque como jefe de línea, es el encargado militarmente de hacer cumplir los reglamentos y ordenes del jefe de estado mayor general del ejército.....Nuestros cargos, fundados como decimos, de

---

que dicho jefe, en su carácter de 2º jefe del regimiento, ha expedido certificados de oficiales a quién no lo era, que ha prohibido se den academias, de que ha inutilizado uniformes, que ha ordenado la formación de cajas de cuerpo [en los batallones], y de que el ordenanza, por ser empleado en asuntos particulares, no tiene lista la Mayoría cuando los jefes reúnen a los oficiales, son formulados con la imparcialidad necesaria, siguiendo una propaganda de carácter general a favor de un punto tan importante como lo es, sin duda alguna, la buena organización de los cuerpos de la guardia nacional activa” (*El Diario*, 12 de septiembre de 1896).

8852 La Guardia Nacional. Su organización-Academias militares (*El Tiempo*, 5 de febrero de 1895)

8853 La remonta del ejército permanente, aún no se ha resuelto en forma favorable. El enganche y el voluntariado no dan resultado, por la gran absorción de brazos que hacen las industrias, agricultura y comercio. La movilización de los ciudadanos de 20 años ha solucionado en parte esos inconvenientes. Anualmente, serán convocados los que hubieren alcanzado esa edad, bien es cierto que la ley 3318 debe ser reformada para establecer de lleno el servicio obligatorio, no en la forma europea, que sería un inconveniente, pero sí al igual del establecido en Bélgica. Los soldados cumplidos serían reemplazados, por vía de sorteo, por los ciudadanos de 20 años, pudiendo estos hacerse reemplazar con personeros elegidos por ellos mismos o mediante el pago de una suma que el gobierno emplearía en el enganche. El enganche uniforme por dos años, establecido hoy para todas las armas no da resultado. El soldado de caballería y artillería requiere más tiempo para poder ser instruido” (*El Diario*, 15-IX-1896)

8854 MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895. El periódico *El Diario* lo había consignado en sus columnas; pues sostenía “...ya hemos pedido el cambio del procedimiento, incitando a que la marinería de nuestra escuadra así como la tropa de nuestro ejército se reclute mediante el servicio obligatorio entre ciudadanos honestos, desechando y condenando el alquiler de individuos, que se contratan, para satisfacer sus vicios con las cuotas que reciben como prima y desertar enseguida, cuando la han derrochado en la bebida o en el juego. (*El Diario*, 24 de marzo de 1896).

8855 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8856 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8857 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8858 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8859 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8860 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8861 Fuente: MILICIA CIUDADANA. Su Reorganización. El Proyecto de la Comisión de Guerra, *El Tiempo*, 3 de agosto de 1895.

8862 Fuente: **La Milicia Ciudadana. El Mando de los Cuerpos**, por Efraldo, *El Tiempo*, 17 de febrero de 1896.

8863 Fuente: **La Milicia Ciudadana. El Mando de los Cuerpos**, por Efraldo, *El Tiempo*, 17 de febrero de 1896.

8864 Fuente: **La Milicia Ciudadana. El Mando de los Cuerpos**, por Efraldo, *El Tiempo*, 17 de febrero de 1896.

---

<sup>8865</sup> Fuente: Guardia Nacional. Concurso de clases y oficiales. Los comandantes y las academias. Textos franceses caros e incomprensibles para los aspirantes, *El Tiempo*, 22-VI-1898

<sup>8866</sup> Los jefes violando las órdenes terminantes del estado mayor general del ejército, han admitido a los reprobados de la academia, y han nombrado en comisión jefes y oficiales para los batallones. Sobre esto debe el estado mayor general adoptar medidas enérgicas para salvar su autoridad, y ello sería ordenar una investigación, castigando de una manera ejemplar a los coroneles, jefes de regimiento que por una orden de cuerpo, han dispuesto lo que únicamente puede disponer el presidente de la República; nombrar jefes y oficiales para la guardia nacional (*El Diario*, lunes 7 de setiembre de 1896)

<sup>8867</sup> Fuente: Guardia Nacional. La reunión de ayer. Ascensos, *El Tiempo*, 12-VII-1897

<sup>8868</sup> El periódico *El Tiempo* veía con placer el proyecto que el doctor Pellegrini presentó a la cámara en la sesión del 17 de septiembre de 1895, creando una Academia de guerra, "...en la cual recibirán instrucción superior en el arte de la guerra, los jefes subalternos de nuestro ejército. Las Academias de Guerra que existen en los ejércitos de los países que marchan a la cabeza de la civilización militar, eran de suma necesidad en el nuestro, a fin de uniformar los conocimientos de los jefes destinados a mandar los cuerpos, y de prepararlos convenientemente para la alta misión que han de desempeñar en caso de guerra" (*El Tiempo*, 19-IX-1895). En ese sentido, el Estado Mayor remitió la nota-circular que el periódico *El Diario* había anunciado, significando "...la conveniencia de establecer cuanto antes las academias militares de la guardia nacional, a cuyo efecto pone a su disposición el personal de jefes y oficiales de las oficinas de enganche (*El Diario*, 7-III-1896).

<sup>8869</sup> Se ha iniciado por un colega una campaña contra los oficiales surgidos de la academia militar para la guardia nacional y destinada a favorecer a los que por su voluntad no dieron cumplimiento a la ley que hace obligatoria las academias y en consecuencia han sido dados de baja. Hoy se hace eco de un rumor y lo da como el pensamiento dominante en el estado mayor general del ejército. Se trata, dice, de dejar en sus empleos, a los que no se inscribieron en la academia, y por consiguiente, no dieron examen. Los exonerados quedarían en comisión. Ideas contrarias a las que supone el colega, sostiene el jefe del estado mayor general del ejército. El coronel García nos ha autorizado a declarar que de la academia han salido 600 entre jefes y oficiales, número suficiente para los treinta batallones de infantería, y cuatro regimientos, dos de caballería y dos de artillería. Si bien es cierto que el reglamento táctico establece que cada batallón tenga 32 oficiales, es teniendo en cuenta que las necesidades del servicio interno de los cuerpos, y el servicio de guarnición, exige en los cuerpos de línea ese número de oficiales, pero en la guardia nacional no habiendo servicio interno y de guarnición, no es necesario para la instrucción dominical tanto número de oficiales, mas si se tiene en cuenta que las clases, contribuyen poderosamente a la instrucción (*El Diario*, jueves 10 de setiembre de 1896).

<sup>8870</sup> Fuente: Programas monstruos-Los oficiales de la guardia nacional, *El Diario*, 21-II-1896

<sup>8871</sup> Fuente: Programas monstruos-Los oficiales de la guardia nacional, *El Diario*, 21-II-1896

<sup>8872</sup> Fuente: Programas monstruos-Los oficiales de la guardia nacional, *El Diario*, 21-II-1896

<sup>8873</sup> Fuente: Programas monstruos-Los oficiales de la guardia nacional, *El Diario*, 21-II-1896

<sup>8874</sup> Fuente: Programas monstruos-Los oficiales de la guardia nacional, *El Diario*, 21-II-1896

<sup>8875</sup> Fuente: Guardia Nacional. Concurso de clases y oficiales. Los comandantes y las academias. Textos franceses caros e incomprensibles para los aspirantes, *El Tiempo*, 22-VI-1898

<sup>8876</sup> Fuente: GUARDIA NACIONAL. La Batida de Ayer, *El Tiempo*, 2-V-1898. Ver Apéndice A-V.

<sup>8877</sup> Fuente: GUARDIA NACIONAL. La Batida de Ayer, *El Tiempo*, 2-V-1898. Ver Apéndice A-V.

<sup>8878</sup> Fuente: GUARDIA NACIONAL. La Batida de Ayer, *El Tiempo*, 2-V-1898. Ver Apéndice A-V.

- 
- <sup>8879</sup> Para la penetración financiera foránea en la Confederación Argentina, ver Chianelli, 1974; Rato de Sambuccetti, 1999, 136-140; y Caldeira, 1995.
- <sup>8880</sup> Ver Apéndice A-II.
- <sup>8881</sup> En la provincia de Buenos Aires, en 1872, fueron sorteados a soldados y oficiales una enorme cantidad de lotes en el pueblo de Guardia Nacional, actual Chacabuco (Círculo Militar, II, 98-99).
- <sup>8882</sup> Documento No. 24-Paraná, 25-IX-1858- Memoria del Ministerio de Guerra y Marina (MMGyM), 1860, pp.115-116, reproducido en forma íntegra en Apéndice A-I.
- <sup>8883</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8884</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8885</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8886</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8887</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8888</sup> Ver Nellar, 1972, I, 515-517.
- <sup>8889</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8890</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III. Para las elecciones del oficial cajero de un regimiento, ver el caso de Modesto Torres, AGE, Leg.13.074; y el del coronel Pablo Escalada Saavedra, AGE, Leg.4165.
- <sup>8891</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8892</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8893</sup> Coronel Nicolás Martínez Fontes al Inspector y Comandante General de Armas, General José María Francia, Concepción del Uruguay, 16-IV-1860 (MMGyM, 1860, 94-95), reproducido en forma íntegra en el Apéndice A-III.
- <sup>8894</sup> Beverina, 1921, I, 182-185; Nellar, 1972, II, 113; Buffa y Cernadas de Bulnes, 1980, III, 304-306, y Rattenbach, 1958, 143-150. Sobre el empleo de militares mercenarios en la historia universal, ver Weber, 1944, II, 763-766. El personal de tropa manifestaba el

---

Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra en 1946 "...estaba constituido por conscriptos confinados y soldados voluntarios, reclutados estos últimos entre los delincuentes de las cárceles de varias provincias, razón por la cual resultaba difícil mantener la disciplina sin provocar sublevaciones. A este respecto ocurrieron hechos graves. Consta en los sumarios respectivos" (reproducido íntegro en Apéndice C-XXV).

<sup>8895</sup> Ver Nellar, 1972, II, 113.

<sup>8896</sup> Ver Disposiciones dictadas en ejecución de la Ley de Reclutamiento, de 28-IX-1872, en Apéndice A-IV.-

<sup>8897</sup> Sobre la relación entre la Comisaría de Guerra, que dotaba a las cajas de los regimientos, con la Caja de Buenos Aires, en las primeras décadas revolucionarias, ver Halperín Donghi, 1982, 90.

<sup>8898</sup> Weber, 1944, II, 717, 784 y 1059.

<sup>8899</sup> Orzábal, 1901, 394.

<sup>8900</sup> Ampliando los datos sobre las arbitrariedades cometidas por el 2º jefe del 2º regimiento de infantería de G. N., teniente coronel César Aguirre, se dice que dicho jefe "...ha obligado a formar caja de cuerpo a los batallones para sufragar gastos de oficina, por no dar a estos fondos, de los del regimiento, a que está obligado. Tan es así, que los jefes de batallones se ven obligados a hacer gastos que no debieran efectuarlos, mas cuando el regimiento debe hacerlos. Los gastos de tambores y cornetas los tienen que costear los jefes, al igual del año pasado. Ha habido noches que los jefes de batallones han convocado a los oficiales para comunicarles órdenes, y no han podido reunirse en la mayoría, porque el ordenanza de esta sirve en la casa de dicho jefe" (*El Diario*, viernes 11 de septiembre de 1896). Por otro lado, se sabe, que en otras épocas, estas oficinas "...eran un foco electoral, encargadas de levantar gobernadores, causa más que suficiente, para que los habitantes de las provincias, se crean amenazados nuevamente" (*El Tiempo*, 15-X-1895)

<sup>8901</sup> Álvarez, 1893, 8. El racionamiento fue primero por contrata con las denominadas Proveedurías y luego por intermedio de las Intendencias respectivas. Desde febrero de 1896 "...cesan las proveedurías de raciones por contrata en los cuerpos del ejército permanente, hospitales militares, barcos de la armada, subprefecturas marítimas, faros, y demás reparticiones en que se suministraban, entrando a hacerse cargo del servicio las intendencias respectivas" (*El Diario*, 27-II-1896). El racionamiento diario del soldado "...se compone actualmente de carne, galleta, arroz y sal, en todo tiempo y lugar. A veces cuando faltan en campaña los víveres, se sustituyen estos dándole a la tropa doble ración de carne. En las épocas de frío, se agrega una ración llamada extraordinaria que comprende café, azúcar y caña. Además existe la ración mensual de entretenimiento compuesta de yerba, tabaco, jabón y papel de fumar. El cirujano de brigada Dr. Ramón Jiménez, que ha estudiado detenidamente y con éxito la alimentación de los ejércitos europeos y que además conoce muy especialmente el ejército argentino, ha recibido encargo de proyectar un tipo de racionamiento para tropa en campaña y en guarnición....Sería oportuno, ya que se tratan estas cosas, encomendar a quienes corresponda un estudio análogo, respecto a la calidad y cantidad de los forrajes que deben darse al ganado del ejército en marcha y en guarnición" (*El Diario*, 12-III-1896)

<sup>8902</sup> Álvarez, 1893, 21.

<sup>8903</sup> Rodríguez Molas, 1982, 420-424. Sobre la dificultad en el reclutamiento y el recurso a los esclavos en la Guerra de la Triple Alianza, ver Doratioto, 2002, 259-264.

<sup>8904</sup> Schaefer, 1974, 20, citado en Ramírez, 1987, 126.

<sup>8905</sup> El 5 de abril de 1895 se reunió la Junta Superior de Guerra "...para tratar la creación de Intendencias de Eganche con que se pretende sustituir a las famosas oficinas actuales" (*El Tiempo*, 5-IV-1895). Dos semanas más tarde "...continúa en la Junta Superior de Guerra la discusión del proyecto sobre

---

intendencias de enganche presentado por el Estado Mayor General; difícil será que quede resuelto en esa sesión por subsistir aún las divergencias de opiniones que ayer indicábamos, habiendo aumentado el número de los partidarios del servicio obligatorio” (*El Tiempo*, 18-IV-1895)

<sup>8906</sup> Círculo Militar, 1972, 515-516.

<sup>8907</sup> Ramírez, 1987, 124 y 377.

<sup>8908</sup> Miller, 2005, 246.

<sup>8909</sup> “Remonta del Ejército. Centro de reclutamiento”, *El Diario*, miércoles 21 de diciembre de 1892. Sobre el seudónimo de Recluta, ver Tesler, 1991.

<sup>8910</sup> “Remonta del Ejército. Centro de reclutamiento”, *El Diario*, miércoles 21 de diciembre de 1892. Sobre el seudónimo de Recluta, ver Tesler, 1991. El Coronel José María Uriburu indicó en abril de 1896 al estado mayor la conveniencia “...de no dar de alta en los cuerpos de caballería a los individuos de elevada talla, fundado en que por el peso que representan agobian a los caballos, mientras que, por otra parte, no ofrecen ventaja de ningún género (El Diario, 28-IV-1896)

<sup>8911</sup> El Depósito de Reclutas, *El Diario* (Buenos Aires)-13-VIII-1892-No.-3347-p.1; reproducido completo en Apéndice A-VI. Buen resultado estaban dando, al parecer de *El Tiempo*, las oficinas de enganche establecidas en el interior de la República. En el mes anterior de julio de 1896, “...el número de enganchados ha sido de 466, cifra que por el sistema que se observaba antes, jamás se obtuvo. Del número de enganchados, corresponde a la capital 180, cantidad mayor que las dadas por las provincias, y es de llamar la atención que en una ciudad como ésta donde los brazos escasean, haya tanto desocupado, que no tenga mas porvenir que el sueldo de soldado (El Diario, 25-VIII-1896)

<sup>8912</sup> El Depósito de Reclutas, *El Diario* (Buenos Aires)-13-VIII-1892-No.-3347-p.1; reproducido completo en Apéndice A-VI. Sobre la suma que se crea indispensable para la manutención de los alistados durante el corto tiempo que será necesario permanecer en la Provincia con los soldados que se consiga enganchar, ver Apéndice A-VII.

<sup>8913</sup> El Depósito de Reclutas, *El Diario* (Buenos Aires)-13-VIII-1892-No.-3347-p.1; reproducido completo en Apéndice A-VI. Sobre la suma que se crea indispensable para la manutención de los alistados durante el corto tiempo que será necesario permanecer en la Provincia con los soldados que se consiga enganchar, ver Apéndice A-VII.

<sup>8914</sup> Fuente: NUESTROS SOLDADOS. El sueldo y el Enganche, El Tiempo, 25 de junio de 1895

<sup>8915</sup> Fuente: NUESTROS SOLDADOS. El sueldo y el Enganche, El Tiempo, 25 de junio de 1895

<sup>8916</sup> Fuente: NUESTROS SOLDADOS. El sueldo y el Enganche, El Tiempo, 25 de junio de 1895

<sup>8917</sup> Fuente: Las oficinas de enganche. Enganchando enfermos, El Tiempo, 29 de noviembre de 1895

<sup>8918</sup> Fuente: Las oficinas de enganche. Enganchando enfermos, El Tiempo, 29 de noviembre de 1895

<sup>8919</sup> Fuente: Las oficinas de enganche. Enganchando enfermos, El Tiempo, 29 de noviembre de 1895

<sup>8920</sup> Fuente: Las oficinas de enganche. Enganchando enfermos, El Tiempo, 29 de noviembre de 1895

<sup>8921</sup> Fuente: Oficinas de Enganche. Resultados contraproducentes, El Tiempo, 11 de enero de 1896)

<sup>8922</sup> Fuente: Oficinas de Enganche. Resultados contraproducentes, El Tiempo, 11 de enero de 1896)

<sup>8923</sup> Cutolo, II, 703.

- 
- <sup>8924</sup> Debo toda esta información parlamentaria a la desinteresada colaboración de mi colega Joaquín Meabe. Sobre los certificados de tierras a militares, ver Ramírez, 1987, 140.
- <sup>8925</sup> Comunicación personal de Joaquín Meabe.
- <sup>8926</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, tomo 2, Bs. As., 1888, pag.s 23-28.
- <sup>8927</sup> Comunicación personal del Dr. Joaquín Meabe.
- <sup>8928</sup> AGE, Leg.3346.
- <sup>8929</sup> AGE, Leg.3346, fs.17.
- <sup>8930</sup> AGE, Leg.3346, fs. 17v.
- <sup>8931</sup> Venta de Tierras fiscales a militares (***El Porvenir Militar***, septiembre de 1893, n.2, p.3). Sobre los ascensos concedidos durante la Revolución del 90, ver García Enciso, 1970, Anexos 6 y 7, pp.651-654.
- <sup>8932</sup> El Ejército, ***El Diario***, 9-VI-1892, año XI, n.3292, reproducido completo en el Apéndice A-VI. Amén de un militar como el oriental Diego Lamas, el seudónimo es posible también que perteneciera a Nicolás Granada. Aunque periodista y colaborador de los diarios ***La Tribuna***, ***El Tiempo***, ***El Argentino*** y ***El Diario***, Granada conocía de temas militares por ser hijo del coronel Nicolás Granada, y nieto del coronel Miguel Granada. Estaba casado con Nicasia Roca, hija del Gobernador Carlos Roca Allende.
- <sup>8933</sup> El Ejército, ***El Diario***, 9-VI-1892, año XI, n.3292, reproducido completo en el Apéndice A-VI.
- <sup>8934</sup> El Ejército, ***El Diario***, 9-VI-1892, año XI, n.3292, reproducido completo en el Apéndice A-VI.
- <sup>8935</sup> Decreto del 16-VIII-1890 (Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército, t.II, n.8; reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2326, pp.394-95.)
- <sup>8936</sup> Resolución del 5 de septiembre de 1890 (Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército, t.II, n.9; reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2328, pp.395-98) .
- <sup>8937</sup> Decreto del 31 de diciembre de 1891 (reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2406, pp.448-49)
- <sup>8938</sup> Decreto del 3 de febrero de 1892 (reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2411, pp.452)
- <sup>8939</sup> Decreto del 1 de septiembre de 1892 (reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2432, pp.464-65).
- <sup>8940</sup> Decreto del 30 de septiembre de 1892 (reproducido en la Colección Domínguez, v.3-4, ítem 2439, pp.468-69)
- <sup>8941</sup> Condecoraciones militares (***El Porvenir Militar***, 8-XI-1893, n.10, p.2) .
- <sup>8942</sup> El Ejército, ***El Diario***, 9-VI-1892, año XI, n.3292, reproducido completo en el Apéndice A-VI.
- <sup>8943</sup> El Gobierno Nacional concedió al coronel José M. Calaza "...la ubicación de las 16.000 hectáreas que le acordó en venta el Congreso en la Pampa Central, sección XX, fracción B, lote 6 y mitad 0 del lote 5. Es esta una de las más grandes injusticias que se han cometido por la actual administración y no pasará

---

sin que hagamos oír nuestra protesta en nombre de la equidad con que deben ser tratados los militares argentinos y que tan despreciativamente miran nuestros hombres de gobierno. Hemos dicho ya que lo que trae desquiciado a nuestro ejército es la falta de justicia en el gobierno para con sus miembros y en todos los casos que afectan a la institución; la violación descarada de la ley de ascensos; el favoritismo para los unos y la arbitrariedad para los otros, y ofrecemos a nuestros lectores como prueba concluyente de esa verdad el caso presente. Empeñados en una campaña de moralizadora reacción que nos impone el deber bien entendido, no hemos de detenernos hasta obtener lo que tanto anhelamos en bien del ejército nacional, y si en la prédica caen bajo los puntos de nuestra pluma nombres que quisiéramos respetar, no tenemos la culpa de ello: la tienen los que se complican en actos injustificables, ya por interés personal, ya por debilidad, o por cualquier otro motivo, apareciendo en ellos como causa, agente o instrumento. Si tocamos antecedentes personales será únicamente de aquellos que se refieren a la vida pública y eso tan solo por indispensables para justificar la tesis: mal podríamos demostrar la existencia del error o dolo sin traer a la vista los elementos de prueba. Impugnamos la resolución del gobierno por injusta: debió el Presidente de la República vetarla, pero no lo ha hecho, y no nos extraña. Esa concesión, reservada por la ley a los militares argentinos que conquistaron con su esfuerzo la tierra poseída por el salvaje hasta 1879 y como un premio especial al sacrificio consumado, ha sido en el caso presente arrancada al Senado por el engaño y la mentira para favorecer a un funcionario público que ni siquiera es militar; es decir, representa una verdadera defraudación y encarna un atropello a derechos de tercero, legítimamente adquiridos, que debieran ser el Congreso y el Ejecutivo los primeros en respetar (*El Tiempo*, 3 de enero de 1895)

<sup>8944</sup> La Oficina de Tierras cuando ocurren estos reclamos, informa de acuerdo con aquella prescripción y el individuo tiene que hacer una peregrinación que no siempre concluye favorablemente para el que solicita. A otros les sucede que al pedir sus títulos de propiedad, se encuentran con que alguien los ha recibido exhibiendo documentos falsos autorizados legalmente por escribanos y testigos. En esta parte, el gobierno ha sido defraudado escandalosamente, pues se ha podido comprobar en algunos casos, que se han dado tierras a personas que presentaban poderes otorgados por individuos fallecidos antes de firmar el documento mencionado. Hoy mismo, si se investigara con algún cuidado, se podría descubrir el fraude y sus autores, quienes han obtenido de esta manera bastantes concesiones para enriquecerlos. Ayer nomás, se nos presentó un viejo soldado del regimiento 3 de caballería, pidiéndonos consejo y ayuda. Hace dos años que inició la solicitud reclamando sus tierras, y después de ese tiempo se le informa que los certificados han sido entregados a su viuda. Y el hombre ni se ha muerto ni nunca fue casado (*El Diario*, 29-V-1896)

<sup>8945</sup> Para denuncias s/falsas excepciones, ver el caso de Everardo Power, AGE-Leg.10.345

<sup>8946</sup> El Comandante Supisiche (La Vanguardia, 8-X-1908), reproducido en el Apéndice D-VI. Con referencia al Consejo de Guerra formado contra el General Patricio Azcurra y presidido por el General José Félix Uriburu, ver AGE, Leg.122. Este crucial dato es omitido en la obra apologética producida por Jacinto Yaben (Yaben, 1952, I, 693).

<sup>8947</sup> ver Pomer, 1968, 299-309. La casa y solar que le regalan a Mitre por suscripción popular en la calle San Martín, en el centro de Buenos Aires, fue mayoritariamente financiada por Ambrosio P. Lezica y Anacarsis Lanús, ver Pomer, 1968, 302.

<sup>8948</sup> Sobre la Casa Lezica & Lanús durante la Guerra del Paraguay, ver Pomer, 1968.

<sup>8949</sup> Proveeduría monstruo-Un negocio de dos reales cobre (*El Municipio*-11-VII-1891-p.1. col-2), reproducida en forma íntegra en el Apéndice A-IX.-

<sup>8950</sup> Rouquié, 1981, I, 76. Entre los primeros egresados de la Escuela Superior de Guerra en 1901 figuran varios oficiales que están mencionados reiteradamente en este trabajo, entre ellos: Estéban García, Ezequiel Pereyra, Pastor Marambio y Jorge Señorans (Picciuolo, 2000, 81).

<sup>8951</sup> Sobre la desmovilización de los ejércitos, ver Moore, 1996, 363-364.

---

<sup>8952</sup> Scobie, 1964, 276, citado en Ramírez, 1987, 119-120; y Ramírez, 1987, 142.

<sup>8953</sup> Oszlak, 2004, 270. Ver la nómina de oficiales leales y opositores en Rivero Astengo, 1944, 166 y siguientes, citado en Botana, 1977, 38, nota 13.

<sup>8954</sup> Del Estado Mayor General Permanente vinieron a depender siete secciones: 1. Dirección de Estado Mayor; 2. Inspección de Armas; 3. Historia Militar y Fojas de Servicios; 4. Ingenieros Militares, Topografía y Carpología; 5. Dirección General de Parque, Talleres y Depósito; 6. Comisaría General de Guerra; y 7. Sanidad Militar (Rodríguez, 1964, 81). La Vicaría General, que originalmente integraba la Comandancia General de Armas, pasó en 1884 al Estado Mayor, hasta que en 1900 se crea la 11ª sección del Ministerio de Guerra (Rodríguez, 1964, 28).

<sup>8955</sup> Sobre la creación de escuelas de cadetes en Austria (1748), Francia (1751) e Inglaterra (1802), ver Mann, 1997, II, 554. Para la comparación con la Academia Militar de Venezuela, ver Paredes Urdaneta, 1940.

<sup>8956</sup> La Comisión del Parque Tres de Febrero estaba constituida originalmente por el Ingeniero Don Rómulo Otamendi, D. Narciso de Estrada y D. Eugenio Courtais

<sup>8957</sup> Memoria del Ministerio de Guerra y Marina (MMGyM), 1865, Anexo L, No 4, pp.73-75, citado en Rodríguez, 1864, 31.

<sup>8958</sup> En 1874, el Coronel Czetz, Director del Colegio, había propuesto trasladar el Colegio a inmediaciones del pueblo de Zárate (MMGyM, 1874, p.771); y el Coronel Mariano Moreno a localidades fuera del municipio de la ciudad, pero a moderada distancia y próximo a una estación ferroviaria, como Floresta o Ramos Mexía (Mariano Moreno al Ministro de Guerra y Marina Coronel Adolfo Alsina, Buenos Aires 20 de junio de 1875, en MMGyM, 1876, 300-

<sup>8959</sup> Sobre los Colegios Nacionales, ver Saguier, 1996-1997.

<sup>8960</sup> Para un estudio de antropología social de la Academia Militar de Agulhas Negras (Brasil), ver Castro, 1990. Para el estudio de la Real Academia Militar de Artilharia Fortificação e Desenho (1792-1809), ver Pardal, 1985.

<sup>8961</sup> Fukuyama, 1995, 8.

<sup>8962</sup> Con respecto a la antigüedad, como criterio de ascenso, siempre se ha preguntado ¿por qué razón debe ascender el más viejo y/o antiguo y no el más joven? Probablemente, la respuesta la debemos hallar en la Edad Media, cuando se discutían los derechos sucesorios de las fundaciones capellánicas asignándose para ello el derecho de primogenitura, o en el Renacimiento, cuando como en Hobbes se debatían los derechos sucesorios de los monarcas atribuyéndose para ello también el derecho de primogenitura. En ese sentido, Gérard Lebrun, discutiendo a Pascal, responde: "es necesario que haya una regla visible e incontestable; si cada cual entendiera que tiene derecho a la corona por sus méritos, seguiría la guerra de todos contra todos; por eso, hay que neutralizar los valores" (Lebrun, 1983, 22-24, citado en Ribeiro, 1998, 87). Reglas de juego neutras, "...y que incluso insistan en esa neutralidad -esto es, en su radical indiferencia

---

respecto a los contenidos--, serán las mejores para apaciguar las pasiones, y así hacer de la política una esfera en que el conflicto pueda ocurrir sin que redunde en guerra de todos contra todos" (Ribeiro, 1998, 87). Sin embargo, según mi colega Bernardo Gandulla, la antigüedad en los ejércitos equivalía a la primogenitura, y su naturaleza es propia de todas las sociedades patriarcales, remontándose su origen a tiempos pre-bíblicos. Más específicamente, según una comunicación personal que me facilitara el general Teófilo Goyret, el criterio de la antigüedad para el ascenso obedecía a que al caer herido o muerto un jefe en el campo de batalla no existía tiempo para debatir o votar cual era el mejor para sucederlo. Sobre la antigüedad como un grado mas, ver Guerlac, 1968, 77.

<sup>8963</sup> Germán Mejías, Teniente 1° de la 2ª Compañía del 1er Escuadrón del 2° Regimiento de Artillería Ligera, y ayudante en comisión del Coronel Miguel E. Molina, Jefe del Regimiento 2° de Línea se presenta y expone que "...estando sujetos los Jefes y Oficiales del Arma a que pertenece desde el año 1875, al concurso determinado por la ley de ascensos (1882) para poder optar a la promoción relativa, se encuentra en el caso de no poder concurrir con las ventajas que poseen los oficiales que han salido del Colegio Militar..y por consiguiente casi seguro de vivir postergado cada vez que tenga lugar el espresado concurso teniéndose en cuenta que a los oficiales, que han hecho su carrera sin los elementos de instrucción suficiente, no se les ha proporcionado profesores ni otros medios de adquirirla y solo merecen ser compensados por sus buenos y prolongados servicios" (Archivo General del Ejército, AGE, Leg.7937, fs.1). Debo mi incursión en este fabuloso archivo a la sugerencia de mi entrañable amigo el poeta José González Ledo, quien había incursionado por el mismo en la década del 30. Y la incursión en el Archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se la debo a la sugerencia de mi correligionario y amigo Juan José Rosenberg, quien revistó en ese destino militar cuando soldado conscripto.

<sup>8964</sup> El Colegio se estableció en Palermo, en el antiguo caserón de Rosas, ubicado entre las actuales calles República de la India (ex Acevedo), Av. Libertador, el Río de la Plata y el ex Arroyo Maldonado (Schavelzon y Magaz, 1996, 1230). Según su Director el Coronel Simón Santa Cruz "...en Palermo donde estamos estrechos, tenemos: dos vastos salones para dormitorios con sus lavatorios correspondientes, cinco salas espaciosas para clases, la menor de las cuales, mayor que la del Caballito, un comedor inmenso, una hermosa sala de armas, sala de la Dirección, dos piezas para la Mayoría, gabinete de Física, id de Química, id. de Telegrafía, Enfermería, Botica, cuarto de visitas, cuarto del boticario, depósito de vestuario, id. de combustibles, id. de carne, tres piezas para el Director, una para Secretaría, Comedor de Jefes, antecomedor y ofice depósito de ropa blanca, doce piezas para oficiales, sastrería, ropería, carpintería, caballeriza y calera" (ver Apéndice B-XII).

<sup>8965</sup> Espina Barrio, 1999. Para Weber, este tipo de educación corresponde al tipo educativo de las primitivas asociaciones guerreras (Weber, 1944, II, 990).

<sup>8966</sup> Para Imaz, en el caso de los militares, la "mentalidad de status" variaba con el arma y con la historia del arma en el país (Imaz, 1964, 72).

<sup>8967</sup> ver Jarnés Bergua, 1982, 158, citado en Figueroa Perea, 2005, 60.

<sup>8968</sup> Sobre incidente entre oficiales por no corresponder el saludo ver AGE, Leg.9978 y 8555.

<sup>8969</sup> El Director posterior Coronel Julio de Vedia propuso en 1878 modificar el Plan de Estudios "...con vistas a equiparar nuestro

---

Colegio con sus similares de Berlín, Viena, San Petersburgo y West Point" (García Enciso, 1970, 129).

<sup>8970</sup> Capdevila, A.; P. Ricchieri; y Juan Balestra (1901, 1997): "Debate sobre servicio militar obligatorio", en Natalio R. Botana y Ezequiel Gallo (1997).

<sup>8971</sup> El primer Director del Colegio Coronel Juan Czetetz agrega en 1874 una cátedra de Física y otra de Administración y Legislación Militares, "...que armonizaban con los planes en vigencia existentes en los Colegios Nacionales".

<sup>8972</sup> García Enciso, 1970, 101. Entre las materias específicamente militares se destacaban las de artillería y fortificaciones, para las cuales se utilizaban los textos de Schell (1879), Maldones (1883), Avilés Arnau (1892) y Reynolds (1894). En 1891 se crea en el II y V año la clase de Historia de la Guerra, para la cual es propuesto el Teniente 1° Enrique Rostagno (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.15, folio 418).

<sup>8973</sup> Para las materias de Fortificaciones y Artillería se utilizaban los textos de Schell (1879), Maldones (1883), Avilés Arnau (1892) y Reynolds (1894). En 1891 se crea en el II y V año la clase de Historia de la Guerra, para la cual es propuesto el Teniente 1° Enrique Rostagno (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.15, folio 418).

<sup>8974</sup> AGCMN, Orden del Día, 4-IV-1877, libro 3, folio 229; y Orden del Día del 22-VIII-1877, citadas en García Enciso, 1970, 123. Esas Justas o Torneos se restauraron en 1945, y el General García Enciso fue uno de los primeros en inaugurarla (Comunicación Personal del General García Enciso)..

<sup>8975</sup> ver Apéndice B-XXII. Director Alberto Capdevila al Jefe del Estado Mayor General Lorenzo Vintter, San Martín, III-1895 s/modificación del Reglamento Interno (AGCMN-LCN-No.16-folio 371), reproducido íntegro en Apéndice B-XXI. Y General Carlos E. O'Donnell al Jefe del Estado Mayor General, San Martín, 26-II-1896 s/modificación del actual Plan de Estudios (AGCMN-LCN-No.17-folio 268), reproducido completo en Apéndice B-XXII.

<sup>8976</sup> Director Alberto Capdevila al Jefe del Estado Mayor General Lorenzo Vintter, San Martín, III-1895 s/modificación del Reglamento Interno (AGCMN-LCN-No.16-folio 371), reproducido en Apéndice B-XX.

<sup>8977</sup> ver Apéndice B-XXI.

<sup>8978</sup> ver Apéndice B-XXII. Cabe destacar que Santa Cruz era egresado de Saint Cyr, veterano de la Guerra de Crimea, uno de los yernos del General Justo José de Urquiza, y probablemente le debía el cargo a su conuñado el General Luis María Campos. El Profesor de Dibujo Lineal Roberto Fincati al fundar su renuncia en septiembre de 1887 "...propone como perfectamente preparados para el desempeño de esa clase, al ex alumno de este Colegio Teniente 2° Nicolás de Vedia" (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 240).

<sup>8979</sup> El Director Julio de Vedia se queja al Ministro que la Comisión Superior Inspectora, "...prescindiendo completamente del Reglamento, de la práctica observada sin interrupción y de las consideraciones debidas al infrascrito, prescindiendo de todo, y asumiendo facultades que no le han sido concedidas por el Decreto de su creación, y sin una simple consulta a esta Dirección no solo proponga Profesores sino que se anticipe a reconocer derecho adquirido por el que regentea una

---

clase para ocupar otras creadas o adscriptar a las que regenteaba antes" (Apéndice B-XV). La Comisión Examinadora del Colegio Militar estaba constituida en 1884 por Julio de Vedia, Cosme Becar, Manuel Olascoaga, Juan F. Guido, Juan Czetz, Liborio Bernal, Liborio Muzlera, y Julián Voilajuson (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1884-85, 178).

<sup>8980</sup> El investigador colega Juan A. Fazio (UTDT) está trabajando sobre logias militares para un período posterior.

<sup>8981</sup> Cárcano, 1944, 77.

<sup>8982</sup> Cárcano, 1944, 77. Sobre los padres de los Coroneles Parkinson, ver Hanon, 2005, 660. El Coronel Carlos O'Donnell no alcanzó a graduarse en el Colegio Militar, pues había sido retirado del mismo por su padre el médico Sabino O'Donnell, quien trabajaba en la Enfermería del Colegio.

<sup>8983</sup> Rouquié, 1984, 103. Para el reclutamiento militar en Brasil en los siglos XVIII y XIX, ver Mendes, 2004. Para la tradición militar portuguesa en la composición del generalato brasileiro (1837-50), ver Barreto de Souza, 2004. Para el reclutamiento militar en Rio de Janeiro durante la Guerra del Paraguay, ver Izecksohn, 2004.

<sup>8984</sup> Rouquié, 1984, 105.

<sup>8985</sup> Imaz, 1964, 59-62.

<sup>8986</sup> Rouquié, 1981, I, 104-105. Sobre la composición y extracción social y nacional de un grupo de generales que ingresaron al arma entre 1875 y 1885, ver los cuadros 1, 2 y 3 en Rouquié, 1981, I, 105-107. Sin embargo, la selección de apellidos de militares que hace Rouquié para categorizarlos en grupos de nacionalidad de origen diferentes, al ignorar los apellidos maternos de dichos oficiales, y/o los parentescos políticos de los mismos, puede inducir a equívocos o errores (Rouquié, 1981, I, 112)..

<sup>8987</sup> Rouquié, 1981, I, 113.

<sup>8988</sup> Cantón, 1971, 97, nota 5.

<sup>8989</sup> Ministro de Guerra Adolfo Alsina al Director del Colegio Cnel. Mariano Moreno, Buenos Aires, 4-VI-1875 (MMGyM, 1876, 297-300).

<sup>8990</sup> Figueroa, 2004.

<sup>8991</sup> Rouquié, 1986, I, 89.

<sup>8992</sup> La presencia de oficiales de color no era escasa. El caso del Teniente Coronel Estanislao Maldones (h) no fue una excepción. Andrews (1980) nos brinda en el Apéndice C de su obra un listado de una docena de oficiales de color (Andrews, 1980, 228-231). Pero ello no querría decir que en el seno del ejército argentino no se practicara el racismo. La prueba está, que pese a su inusual trabajo intelectual en la técnica artillera, Maldones no pasó del grado de Teniente Coronel.

<sup>8993</sup> Para un desarrollo sobre la conciencia estamental, ver Moore, 1996, 464-465. Sobre los alumnos agregados o externos, ver Apéndice B-XVI. Sobre el pago de mensualidad por trimestres adelantados por parte de

---

los alumnos pensionistas, ver Apéndice B-XIX. El Coronel Simón Santa Cruz le informa al Ministro de Guerra que "...tengo a más de 17 oficiales y cadetes del Ejército que habiendo solicitado a V.E. han venido a seguir sus estudios y en el interior del Colegio son considerados todos como Cadetes, llevando el uniforme y sin que nada los distinga de sus compañeros" (MMGyM, 1881, II, 273).

<sup>8994</sup> Sobre el máximo de alumnos por curso, ver Apéndice B-XVIII. Restringido el ingreso en gran parte a huérfanos e hijos de militares, en 1875 el Ministro de Guerra "...lo abre a todos aquellos que deseen ingresar al mismo" (García Enciso, 1970, 111). Cinco años después, en el año 80, se presentaron 40 candidatos, en el 81 fueron 72, en el 82 se presentaron 87, en 1883 fueron 247 los aspirantes, y en 1884 se alcanzó el record de 314 candidatos. (Coronel Santa Cruz al Comandante Viejobueno, Palermo, Archivo General del Colegio Militar de la Nación, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 231). Para tener una idea del impacto que la denominada guerra contra la subversión (1976-82) tuvo en las vocaciones militares, Stepan (1988) revela que si bien en 1980-81 el Colegio Militar recibió 1700 solicitudes de ingreso, para 1985-86 el número cayó a 850, aproximadamente la mitad, por lo que su Director confiesa que la institución estaba operando en la década del 80 a la mitad de su capacidad (Stepan, 1988, 102 y 113, nota 10).

<sup>8995</sup> El Director Santa Cruz le manifiesta al Comandante General de Armas que "...creo que no conviene al Colegio Militar recibir alumnos externos que pierden un tiempo precioso en los viajes a la Ciudad, aún en el caso que no lo pierdan en otras distracciones fáciles de encontrar en la calle, causando esto la desmoralización para los alumnos internos" (Santa Cruz al Comandante General de Armas, Palermo, Noviembre 31 de 1883 (AGCMN, LCN, No.11, folio 411).

<sup>8996</sup> "...en el Colegio se admiten indistintamente los hijos de todas las provincias hallándose hoy mismo representadas todas por partes proporcionales" (Palermo, 8-XI-1887, AGCMN, LCN, No.13, folio 314).

<sup>8997</sup> MMGyM, 1881, II, p.279.

<sup>8998</sup> Un Oficial o Profesor del Colegio Militar debiera "...formar parte de la Comisión que oportunamente se nombre en cada Provincia a fin de que pueda haber mayor justicia y uniformidad en las clasificaciones que hacen muchas Comisiones parciales de las Provincias, de las que algunos son tal vez demasiado liberales en sus clasificaciones perjudicando así con ellas a otros que debieran ocupar las becas y mostrando esos jóvenes muy pronto que no han estado bastante preparados para llevar las bacantes quedando afuera los que deberían ocuparlas" (Santa Cruz al Ministro de Guerra, Palermo, 28-IX-1885, AGCMN, No.12, folio 304).

<sup>8999</sup> En febrero de 1883, de los 123 cadetes habidos, 94 eran becarios, 13 agregados, 7 pensionistas, 5 dados de baja (AGCMN, LCN, No. 11, folio 181). En Mayo de 1887, de los 143 cadetes registrados, cien eran becarios, 17 pensionistas, 2 semi-pensionistas, 21 agregados de los cuerpos, y 3 agregados por el Ministerio (AGCMN, LCN, No.12, folio 37). Sobre los oficiales que con carácter de alumnos externos son autorizados a asistir a las clases del Colegio, ver Apéndice B-XVI.

<sup>9000</sup> Sobre el cruce de pertenencias categoriales, ver Doise, 1985, 315-318.

---

<sup>9001</sup> Sobre el diferente saludo militar por arma, ver Apéndice B-XX. Sobre la división entre una pequeña facción titulada de los "europeos", por aspirar ir a estudiar a Francia, y una numerosa fracción de "criollos", ver Apéndice D-VIII. Entre los firmantes de la carta publicada por **El Porteño** se hallaba el cadete Carlos B. Massot, hijo o sobrino de Adolfo Massot, uno de los directores de **El Porteño**. La Caballería discriminaba pues para los ejercicios sobre el terreno, exigía poseer caballo propio. Tal fue el caso del Capitán Eduardo Fernández Valdez [21-38-A] en el regimiento de artillería (AGE-Leg.315).

<sup>9002</sup> Sobre la facultad de destitución de cabos y sargentos y sobre los cuarteles como lugar de prisiones, ver Apéndice B-XVII. Sobre el Depósito Correccional de Menores y como hacían trabajar a los menores de edad en la carga y descarga de los buques, ver **La Prensa**, Domingo 22-IV-1877, reproducido íntegro en el Apéndices D-IX y D-X. En cuanto a la prisión en un cuartel, la expulsión, prisión en Plaza militar o penalidad mayor y su consulta a la Comisión Superior Inspectora de los Institutos de Enseñanza Militares, ver Apéndice B-XIII. De la lista de cadetes y aspirantes provista por la Memoria de Guerra y Marina correspondiente a 1874, una numerosa serie de alumnos no alcanzaron a graduarse por causas desconocidas. He aquí la nómina correspondiente: Francisco Etchepare, Emilio Doudouin, Durban Leiva, Pedro Z. de Bergara, Adalberto Rivadavia, Máximo Amézaga, Rodolfo Osorio, Nicolás Sevane, Pedro Pirán, Peregrino Cañeti, Protacio Leyes, Francisco Rom, Sixto Baró, Arturo Casas, Elías Ferbor, Miguel Cerro, Manuel Herrera, Félix J. Romero, Lorenzo Pierotti, Carlos Alais, César Lobo, Tristán Algañaraz, Pedro Mon, Manuel Navarro, Lorenzo Flores, Abelardo Baes, Tobías Erpa, Juan Berto, Cornelio Gutiérrez, Metrobio Garrido, Arturo García, Jacinto Viana y Neptalí Albiña.

<sup>9003</sup> El 24 de marzo de 1884 el Director Santa Cruz le anuncia al jefe del Estado Mayor General Viejobueno que "...el sábado a las 5 p.m. dejó de existir en su casa particular el Cadete de este Colegio Militar Don Eduardo Vitry, después de una larga y penosa enfermedad" (Coronel Simón Santa Cruz al Ministro de Guerra, Palermo, 24-III-1884, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.11, folio 499). El 11 de noviembre de 1985, con motivo de la muerte del cadete Ernesto Garro, **El Nacional** ataca la Dirección del Colegio, pero según el Coronel Santa Cruz "...todo cuanto dice dicho suelto es una grosera invención y la que carece hasta del más insignificante fundamento. El Cadete Garro, que desde los primeros informes de su enfermedad se le consideró grave, fue atendido con el mayor cuidado como se hace con todo alumno que va a la enfermería dedicando siempre especial esmero a todos aquellos que parecen con síntomas graves y los que por fortuna muy rara vez tenemos, siendo de admirarse el estado de salud de los alumnos del Colegio sin embargo de ser el edificio pequeño ya para el número de alumnos que existen. Que no ha habido ningún cadete preso por orden del Subdirector porque hubiese solicitado permiso para llamar otro médico para ser costeadado por cuenta de ellos habiendo sido por otra parte abonado siempre las consultas de facultativos por esta Dirección. Que si los cadetes han hecho una reunión de fondos ha sido exclusivamente para depositar algunas coronas sobre los restos del compañero y del amigo, en lo que no hallé ningún inconveniente y encontré por el contrario digno de encomio ese proceder entre los alumnos del Colegio Militar" (Coronel Simón Santa Cruz al Ministro de Guerra, Palermo, 16-XI-1885, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 317). Un año después, el cadete Julio Timoteo García fue

---

víctima de la fiebre tifoidea (*La Prensa*, 17-IV-1886, p.4, col.5). Julio Timoteo García había ingresado en 1878 en la Promoción 10<sup>a</sup>, egresó en 1884 como 4º en el Orden de Mérito entre cuarenta egresados, llegó a Teniente y falleció en 1886 a los 18 años de edad (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 377, 2-IV-1886). García era hijo del Coronel Guerrero del Paraguay Julio García y de Dolores Rosendi, y nieto del célebre jurisconsulto Manuel José García.

<sup>9004</sup> A fin de "...dar ventilación a todas las piezas y fumigar los dormitorios, etc. Y como V.S. sabe, en todo este barrio se han producido varios casos de fiebre tifoidea, habiendo fallecido también el Teniente 2º Don Julio García del Primer Regimiento de Artillería, y sido atacados dos cadetes del Colegio Militar los que sacados inmediatamente para ser atendidos en sus casas, van mejor, no habiéndose producido desde entonces ningún otro caso" (Coronel Santa Cruz al Comandante Viejobueno, Palermo, 2-IV-1886, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 377). El nuevamente designado Director del Colegio Coronel Julio de Vedia aprovecha en febrero de 1888 la oportunidad "...para hacer presente a los SS lo que ya he tenido el honor de decirle de viva voz, y es que lo reducido del local hace peligroso y antihigiénico el aglomeramiento de alumnos y que es ya bastante reducido el número de los existentes" (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.14, folio 14). Los dormitorios o cuadras "...se hallan de tal modo llenos que hay camas hasta tocar la puerta de entrada y entre ellos apenas queda el espacio necesario para que circulen los alumnos" (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.14, folio 182).

<sup>9005</sup> Un mes más tarde, en mayo, Santa Cruz confiesa que en los "...últimos días ha aumentado considerablemente el número de enfermos...falta de abrigos de los cadetes en la noche, pues que las camisas que usan de día son demasiado cortas y delgadas, y no teniendo de dormir tienen que acostarse con ellas lo que no es tampoco higiénico según informes del médico cirujano de este Colegio" (Coronel Santa Cruz al Comandante Viejobueno, Palermo, 17-V-1886, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 399).

<sup>9006</sup> Bordi de Ragucci, 1992, capítulo III; y Recalde, 1993, 61. Si bien ni Bordi de Ragucci ni Recalde mencionan el caso del Colegio Militar, este también fue duramente atacado, como lo atestigua su Director: "...tener en la Enfermería 14 cadetes atacados de diarrea y vómitos....[ocasionado por] las malas condiciones higiénicas que rodean al establecimiento y las mismas de este edificio viejo y húmedo" (Coronel Santa Cruz al Comandante Viejobueno, Palermo, XI-1886, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 473).

<sup>9007</sup> Ver AGCMN, No.15, folios 490 y 551. Después de su gira exploratoria el coronel O'Donnell "...ha presentado al Ministro de la Guerra un detallado informe fijándose en una parte de la vasta chacra del Sr. Llavallol en la estación Vicente López. Opina que este terreno sobre una estación de ferrocarril e inmediato por el fondo ma otra, la de Bartolomé Mitre, con frente al Río de la Plata, y a la calle Santa Fé, reúne especiales condiciones para un establecimiento de esa importancia que quedaría situado a un cuarto de hora de la capital, con la ventaja de baños para los alumnos; hermosa vista desde las barrancas, establecimiento del tiro donde hoy existe el Tiro a la Paloma. Según tenemos entendido esta área de terreno sería de 280.000 varas" (El Diario, 4-VIII-1896). El Ministerio pidió en 1896 "un crédito de \$300.000 pesos poco más o menos, que es el presupuestado para la construcción del edificio. Cumpliéndose este proyecto a la letra se daría en tierra con la idea de levantar el edificio en otro terreno que no fuera el que actualmente ocupa en San Martín. Sin embargo, como este último es evidentemente inadecuado, siendo por su posición y ubicación, por su disposición y topografía el que menos se presta para la construcción proyectada, los altos jefes tanto del mismo colegio como del estado mayor se

---

interesan para que el Congreso vote un crédito suplementario de 200.000 pesos poco mas o menos que permita la adquisición de un nuevo terreno". (El Diario, jueves 10 de setiembre de 1896)

<sup>9008</sup> García Enciso, 1970, 282.

<sup>9009</sup> Sobre fugas de cadetes del Colegio Militar, ver Listado L-I, que trae una treintena de cadetes fugados y la fecha de las mismas. En ciertos casos la fuga era acompañado por delitos comunes. Por ejemplo, el 21 de mayo de 1888, el alumno agregado interno Miguel Casco "...ha desertado del Establecimiento llevando alguna ropa de otro alumno" (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.14, folio 170). Y cuando la fuga era reincidente, se le instruía un sumario. En el caso del Cadete Dionisio Alvarez se le instruyó un sumario por haber incurrido en menos de nueve meses en seis fugas (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.15, folio 312).

<sup>9010</sup> En 1891, un año después de la Revolución del 90, se fugan el Aspirante Luis M. Dantas, y los de igual clase Adolfo Gallo, Maximiliano Arredondo y Alejandro Spika, encontrándolos un oficial en una casa de tolerancia de las calles Corrientes y Libertad (AGE, Leg.12.668). El 29 de diciembre de 1886 se fuga el Aspirante de la 1ª. Compañía Adolfo Barrios, que se hallaba arrestado (Coronel Santa Cruz al Comandante Viejobueno, Palermo, 29-XII-1886, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 502).

<sup>9011</sup> A fines de 1883 se registró un conato de suicidio del cadete Ezequiel Pereyra, alumno de 4º año, de 17 años de edad, porteño, quien tremendamente atribulado por una camaradería no correspondida ingirió una solución de fósforo lo que motivó la apertura de un sumario (AGE, Leg.9869). El acusado Pereyra declara que tenía que "...cumplir un juramento con dos amigos [Publio Risso Patrón y Manuel Vega Segovia] y creyendo que no dando cumplimiento faltaba a su palabra de honor y que consistiendo el juramento citado en quitarles él la vida a ellos o ellos a él, antes que quebrantar la amistad jurada y viendo que ya había llegado el caso respecto a uno de ellos,...en caso de no poder ejecutar su primer juramento quitándoles la vida se la quitaría él a sí mismo...también que habíanse prometido el declarante y dos aspirantes mas, ser los únicos amigos entre sí y no tener otros y que sería considerado como falta de amistad el que uno cualquiera de ellos tuviera otro amigo" (AGE, Leg.9869). El Apéndice B-IX reproduce la misiva del cadete Pereyra dirigida al cadete Manuel Vega Segovia hallada en la litera del primero con motivo de la instrucción del sumario correspondiente (AGE, Leg.9869). Y los Apéndices B-X y B-XIX reproducen el castigo de prisión de dos meses en el pontón por haber cometido el conato de suicidio. Pereyra se graduó en 1884 y alcanzó en su carrera el grado de General de Brigada, retirándose en 1916 y falleciendo en 1945 a los ochenta años de edad.

<sup>9012</sup> Ramírez, 1987, 133.

<sup>9013</sup> Sumario mandado instruir el 19 de Noviembre de 1886 contra el Aspirante Joaquín Cano acusado de tentativa de suicidio (AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 472).

<sup>9014</sup> Entre las víctimas de estos episodios debemos resaltar el hipotético caso de Juan José Búcar, egresado del Colegio Militar en 1884. Búcar era hijo de Juan Búcar y Rosalía Brunengo (Vásquez Mansilla, 1988, Item 3127) Digo hipotético pues obedece a las acusaciones del Aspirante César Cerri, explicitadas con mayor detalle

---

en el capítulo 4, que bien podían obedecer a razones de venganza o rencor. Juan José Búcar ingresó en 1879, egresó en 1884 como 27° en el Orden de Mérito entre cuarenta egresados, llegó a Teniente 1°, y falleció en 1891 a los 25 años de edad (Figuerola, 2001; y AGE, Leg.2173).

<sup>9015</sup> ver Apéndice B-XI.

<sup>9016</sup> Jenofonte (Lac. II 12) muestra cómo la pederastia "...ocupaba un notable lugar en la instrucción de los jóvenes espartanos. Se trata de una actividad paidética cuyo énfasis principal no se pone en los aspectos meramente sexuales, contra lo que a menudo se piensa (aunque tiene, sin duda, una componente sexual apreciable). Es más: suele olvidarse que hay testimonios positivos de que la homosexualidad masculina en sí fue considerada por muchas comunidades griegas como un fenómeno anormal y no deseable" "La pederastia helénica se le antoja a Fatás como "...un compañerismo entre guerreros. La homosexualidad griega es de tipo militar y difiere claramente" de esa otra iniciática y sacerdotal que se estudia hoy entre algunos primitivos actuales. Pueden verse paralelos relativamente semejantes en el proceso a los Templarios y en la Hitlerjugend. La amistad varonil de tipo totalizador es una constante entre sociedades guerreras, en que el medio varonil tiende a encerrarse en sí mismo. La exclusión material de las mujeres provoca siempre una ofensiva del amor masculino. En el medio militar puede darse la tendencia a descalificar el contacto con lo femenino, exaltando un ideal propiamente masculino basado en la fuerza y el valor y la fidelidad al compañero y al superior" (Fatás, 1971).

<sup>9017</sup> Sobre el suicidio homosexual, ver Salessi, 2000, 372-375. Sobre el "pánico homosexual", ver Salessi, 2000, 368; y Bazán, 2004, 205. La noción de suicidio inducido la debo a la psicoanalista Marta Ainsztein.

<sup>9018</sup> Sobre los celos como una amenaza dirigida contra el amor propio, ver Brehm, 1985, 226.

<sup>9019</sup> Sobre el escándalo de los cadetes "bufarrones" y la revolución del 4 de Junio de 1943, ver Bazán, 2004, 223.

<sup>9020</sup> Para la política de conquista del Nuevo Mundo, ver Subirats, 1994.

<sup>9021</sup> Oszlak, 2004, 188, nota 100. Para las intervenciones federales a las provincias, ver Sommariva (1929-1931) y Saguier (1998) o capítulo 7 del tomo IX de mi obra en Internet (<http://www.er-saguier-org>)

<sup>9022</sup> A propósito de la carga de caballería y la forma de vivaquear, ver los Apéndices G-VI y G-VII.

<sup>9023</sup> El Ministro de Hacienda le había ordenado a Buschental que entregase al Comandante General de Frontera sobre el Chaco la suma de 11.050 pesos a la vista, para el pago "...de libramientos impagos existentes en poder del referido Comandante General, cuyos libramientos serán remitidos oportunamente por dicho Gefe al Ministerio de Guerra". (Ver Apéndice A-II). Para el Barón de Mauá y la penetración financiera foránea en la Confederación Argentina, ver Chianelli, 1974; y Caldeira, 1995. Sobre Buschental, ver Rato de Sambuccetti, 1999, 136-140.

<sup>9024</sup> ver Diario de Marcha del Cap. Ramón Sánchez Barquet. Campamento La Verde (Santiago del Estero), Abril de 1890 (AGE-Leg.1981), reproducido en Apéndice C-XXVII.-

<sup>9025</sup> Bosch, 1961, citado en Punzi, 1997, 726. Llama la atención como a Punzi le pasó desapercibido el trabajo de Meli, 1968.

<sup>9026</sup> Sobre la autoridad predatoria, ver Moore, 1996, 416-424.

---

<sup>9027</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I. Este documento fue reproducido por primera vez por Fuscaldo, 1982, y citado profusamente por Meli, 1968, 325 y 326. Federico Host era nacido en Alemania en 1822, y se trasladó a la Argentina en 1850, radicándose en Salta, lugar donde alcanzó a ser Jefe de Policía cuando tuvo que organizar su defensa contra la montonera de Felipe Varela. Acompañó a Roca en la Campaña del Desierto, y fue jefe del cuerpo de ingenieros en la Expedición al Chaco, de 1884. Escribió sesudos trabajos en la revista de la Sociedad Geográfica Argentina. Falleció en 1890 (Cutolo, IV, 609-610).

<sup>9028</sup> Meli, 1968, 337; y Altamirano, et. al., 1994, capítulo I, título III.

<sup>9029</sup> Arenas, 1991, 54-55; y Punzi, 1997, 589.

<sup>9030</sup> Punzi, 1997, 639.

<sup>9031</sup> Sin conocer el fundamento que tuvieron las alarmas repetidas que se producían en Bolivia, y que determinaron al gobierno de dicho país a trasladar elementos de guerra y tropas a la frontera, lo que confidencialmente hizo conocer en 1872 el Comandante Napoleón Uriburu al Ministro O. Jofré, "...que se llamaba Gefé Superior Político y Militar del distrito territorial del Gran Chaco, de desalojar el terreno que, desde muchos años atrás, ocupan las fuerzas que actualmente comando, penetró al interior de nuestra línea, abriéndose un camino por el desierto, una partida de 50 hombres del Ejército de Bolivia que traía 40 indios chiriguano; pero el 5 de mayo fueron encontrados por una partida de 15 soldados al mando del Teniente Salas, a la que acompañaban 25 indios que venían haciendo por entre el monte el camino de comunicación entre los fuertes Lavalle y Capitán Sarmiento. El Teniente Salas, tomó la iniciativa al encontrar fuerzas extrañas en nuestro territorio, e intimó al Gefé de esa expedición boliviana Sargento Mayor Terán que depusiera las armas y marchara a la Comandancia a dar explicaciones porqué se encontraba allí. El Mayor Terán pidió tiempo hasta el día siguiente para reflexionar, lo cual concedido por el Teniente Salas, camparon a una distancia conveniente ambas comisiones" (Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9032</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9033</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9034</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9035</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9036</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9037</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9038</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.

<sup>9039</sup> Sobre los Indios del Chaco, Ver Moussy, 2005, II, cap.II; y sobre el territorio indio del Norte o Chaco, ver Moussy, 2005, III, cap.XI. Sobre las Tentativas para abrir una ruta de Tucumán a Corrientes por el Chaco Austral, ver Moussy, III, 348-362.

- 
- <sup>9040</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolderías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI.
- <sup>9041</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolderías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9042</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolderías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9043</sup> ver Paz, 2003, 50-51.
- <sup>9044</sup> Claval, 1999, 166.
- <sup>9045</sup> ver Paz, 2003, 50-51.
- <sup>9046</sup> Meli, 1968, 326.
- <sup>9047</sup> Meli, 1968, 327. Al sólo objeto de comparar, en los combates del Talita, a la vera del Arroyo Alcaraz; y en el de Don Gonzalo, ocurridos en diciembre de 1873, contra las tropas de Ricardo López Jordán, en la provincia de Entre Ríos, según el parte de guerra firmado por el General Martín de Gainza se hicieron en total más de 500 muertos (MMGyM, 1876, p.149 y 158.
- <sup>9048</sup> Ver el Apéndice C-III.
- <sup>9049</sup> Punzi, 1997, 622.
- <sup>9050</sup> Mayor Zenón Ferreira al Comandante en Jefe de la Frontera de Salta, Coronel Juan Solá Fuerte Victorica--Noviembre 17 de 1885. s/ soldados desertores y conato de asesinato (Fuente: AGE, Leg.9437) reproducida en Apéndice C-VII. Sobre la fundación del Fortín Fotheringham, ver Apéndice C-IV.
- <sup>9051</sup> Meli, 1968, 338.
- <sup>9052</sup> Ver Apéndice C-VI.
- <sup>9053</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX
- <sup>9054</sup> AGE, Leg.3371, fs.34.
- <sup>9055</sup> ver Bruno, 1980, 48.
- <sup>9056</sup> Foja de Servicios del Coronel Jorge Señorans (1884-91)- AGE-Leg.12.302, reproducida en Apéndice C-VIII.
- <sup>9057</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX En su Foja de servicio, el Cap. Ángel Herrero informa que consiguió "...llegar al Campamento de los indios recorredores quienes por su bullicio demostraban estar alarmados, atacándolos rápidamente hízoles dos bajas cayendo el mismo mangrullero, sin poder agarrar prisioneros por estar la chusma algunas cuabras adelante del campamento de los indios de pelea. Dejando cuatro soldados al cuidado de las mulas me interné con el resto de la tropa al monte, por los regueros de sangre que allí se veía supongo sean varios heridos, consiguiendo hacerles otra baja, tomarles dos

---

animales cabalgares y quince ovejas. En la toltería que encontré abandonada, halláronse veinte depósitos de algarroba, los que fueron entregados a las llamas, como todos los demás útiles que dejan en su fuga los indios batidos, encontrando entre sus pieles dejadas hasta cueros vacunos”, reproducido completo en Apéndice C-X.

<sup>9058</sup> Para las formas cotidianas de resistencia de los campesinos, ver Scott, 1985.

<sup>9059</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX

<sup>9060</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX. La laguna citada debe ser la que Punzi denomina Laling Laig (Punzi, 1997, 722).

<sup>9061</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX

<sup>9062</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida en Apéndice C-IX

<sup>9063</sup> ver Apéndice C-XI.

<sup>9064</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolterías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI

<sup>9065</sup> Foja de Servicios del Coronel Jorge Señorans (1884-91)- AGE-Leg.12.302, reproducida en Apéndice C-VIII.

<sup>9066</sup> Foja de Servicios del Teniente Carlos Campos Gutiérrez (1887-90)- AGE-Leg.2476, reproducida en Apéndice C-XII

<sup>9067</sup> Foja de Servicios del Teniente Carlos Campos Gutiérrez (1887-90)- AGE-Leg.2476, reproducida en Apéndice C-XII

<sup>9068</sup> Foja de Servicios del Teniente Carlos Campos Gutiérrez (1887-90)- AGE-Leg.2476, reproducida en Apéndice C-XII

<sup>9069</sup> Este mismo Teniente, al dirigirse al cuartel del Retiro a incorporarse a las fuerzas del gobierno en la represión de la Revolución, el 26 de julio de 1890, fue herido de bala en el pecho en la boca calle de 25 de Mayo y Charcas. (AGE, Leg.2476).

<sup>9070</sup> Reducción del indio Chaqueño-Problema a Resolverse, **La Tribuna**-Paraná, XII-1908.

<sup>9071</sup> Reducción del indio Chaqueño-Problema a Resolverse, **La Tribuna**-Paraná, XII-1908

<sup>9072</sup> Los sucesos de Corrientes, **Sud América**, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el Apéndice E-XI. Donovan había montado cuando coronel en 1880 el batallón 8 de Línea con elementos indígenas reclutados entre los indios amigos de las comunidades que se habían sometido. Ese fue el Batallón que el Presidente Avellaneda hizo desfilar en Palermo en vísperas de la Revolución del 80 provocando un incidente con la angustiada población civil que vivaba a Buenos Aires (Gutiérrez, 1959, 96-97). Para la obra del Círculo Militar, la unidad que incorporó un escuadrón de indígenas en 1866, era el Regimiento No 6 de Caballería de Línea (Círculo Militar, II, 63).

- 
- <sup>9073</sup> La intervención de Corrientes, enviada por el Ministro Quintana en 1893, estuvo custodiada por las tropas de la Guarnición del Chaco Central (Formosa) al mando del General Napoleón Uriburu, la cual puso fin a la rebelión, convocando a elecciones y colocando en funciones a los electos por el Colegio Electoral: los liberales Valentín Virasoro y Daniel Artaza. (Mantilla, 1972, 325).
- <sup>9074</sup> Ubertalli, 1987, 39.
- <sup>9075</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Ministro de Guerra, Resistencia, 25 de marzo de 1909 s/puestos y grandes guardias (AGE, Leg. 9128). reproducida en Apéndice C-XVI
- <sup>9076</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Ministro de Guerra, Resistencia, 25 de marzo de 1909 s/puestos y grandes guardias (AGE, Leg. 9128). reproducida en Apéndice C-XVI
- <sup>9077</sup> Sobre el Diario de Marcha del Capitán Alberto Benavides, ocurrido en 1912, y el incidente sangriento con el cacique Ilirí, ver Apéndice C-XIX. Sobre las novedades de patrulla del Teniente Felipe Leguizamón Pondal en 1912, ver Apéndice C-XX. El Tte. 1º Juan F. Spangenberg le informa al Jefe del Regimiento 5 de Caballería Coronel Juan Solá en 1913 que "...examinados detenidamente los ranchos desde 500 metros y al completo abrigo del fuego de los indios, resultaron estar éstos fuertemente atrincherados, trincheras que más tarde al ser tomadas resultaron ser de una extensión de 400 metros construidas de palo a pique de dos metros de alto, de algarrobo, quebracho y palo mataco de un espesor de 30 centímetros de diámetro y desde donde nos hacían un fuego nutrido" (reproducido íntegro en Apéndice C-XXI). Sobre fortines pasados a degüello en 1929, ver Apéndice C-XXIII. Para sublevaciones indígenas posteriores y movimientos milenaristas, ver Bartolomé, 1972, y Ubertalli, 1987.
- <sup>9078</sup> Amaya (2005) detalla como el sabotaje se perpetraba en las postas, entre fortín y fortín, y como se practicaba el voleo de los alambres.
- <sup>9079</sup> Foja de Servicios del Capitán Alejandro Sarmiento (1886-87)- AGE-Leg.12.130, reproducida íntegramente en el Apéndice C-IX.-
- <sup>9080</sup> Mayor Matías Aldasoro al Teniente Coronel Don Francisco Villarino- Tucumán, Julio 7 de 1911 s/ataque de indios maticos (Fuente: AGE, Leg.5743), reproducido completo en el Apéndice C-XVIII.-
- <sup>9081</sup> Mayor Matías Aldasoro al Teniente Coronel Don Francisco Villarino- Tucumán, Julio 7 de 1911 s/ataque de indios maticos (Fuente: AGE, Leg.5743), reproducido completo en el Apéndice C-XVIII.-
- <sup>9082</sup> Teniente Coronel Aristóbulo de Vera, de la II División (D.G.A.G.) al Sr. Director General de Arsenales de Guerra, Buenos Aires, 27 de abril de 1929 s/fortines pasados a degüello (Fuente: AGE, Leg.13.535), reproducido íntegramente en el Apéndice C-XXIII.-
- <sup>9083</sup> Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en su totalidad en el Apéndice C-XXV.-
- <sup>9084</sup> Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en su totalidad en el Apéndice C-XXV.-
- <sup>9085</sup> General Julio Lagos Comandante en Jefe del Ejército al Ministro de Guerra, Buenos Aires, 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en el Apéndice C-XXVI.-
- <sup>9086</sup> Ese fue el caso de los Kazajos durante la dominación zarista y soviética, y de los denominados "pieles rojas" en USA. Sobre las poblaciones cazadoras y recolectoras, ver Clastres, 1981; y Bird-David, 1992.
- <sup>9087</sup> ver Apéndice C-II. Sobre la mano de obra de plantación forzada en Tucumán (Argentina), ver Garcia Soriano, 1969; Guy, 1978; y Depetris, 1992.

- 
- <sup>9088</sup> Giménez Zapiola, 1975, 98.
- <sup>9089</sup> Ver Bonaudo y Sonzogni, 2000.
- <sup>9090</sup> ver Sidicaro, 2005.
- <sup>9091</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9092</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9093</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9094</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9095</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9096</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9097</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.
- <sup>9098</sup> La Ley de Conchavos (*La Vanguardia*, 21-III-1897), artículo reproducido en el Apéndice D-V.
- <sup>9099</sup> ver Trinchero, Piccinini y Gordillo, 1992.
- <sup>9100</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9101</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9102</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9103</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9104</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9105</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI

- 
- <sup>9106</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9107</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9108</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9109</sup> Capitán Juan Méndez al Jefe Interino de la 4ª División de Ejército Coronel Don Manuel Sosa, Resistencia, 11 Noviembre 1887 s/dispersión y cambio de tolдерías (Fuente: AGE, Leg.7982). reproducida en Apéndice C-XI
- <sup>9110</sup> Sobre la persistencia del Antiguo Régimen en Europa, ver Mayer, 1984. Sobre el problema estamental, ver Rattenbach, 1958, 47-49.
- <sup>9111</sup> Ver la descripción del ejército nacional en tiempos de la Guerra contra el Imperio del Brasil, en Ocampo, 2003, 170-171.
- <sup>9112</sup> Said, 1996, 170.
- <sup>9113</sup> Grapho, seudónimo de identidad inhallable pero que debería pertenecer a un militar muy probablemente José M. Castro Sundblad, Conspiración Crónica (*El Diario*, viernes 23-IX-1892), reproducido completo en el Apéndice D-I. Grapho también colaboraba en *El Municipio*, de Rosario, excelente periódico dirigido por Deolindo Muñoz, y que contrariamente a su título tenía por sus múltiples intereses una envergadura nacional y hasta internacional.
- <sup>9114</sup> Grapho, seudónimo de identidad inhallable pero que debería pertenecer a un militar muy probablemente al oriental Diego Lamas o en su defecto a José M. Castro Sundblad, Conspiración Crónica (*El Diario*, viernes 23-IX-1892), reproducido completo en el Apéndice D-I. Grapho también colaboraba en *El Municipio*, de Rosario, excelente periódico dirigido por Deolindo Muñoz, y que contrariamente a su título tenía por sus múltiples intereses una envergadura nacional y hasta internacional.
- <sup>9115</sup> Grapho, seudónimo de un militar que bien podría tratarse del oriental Diego Lamas, Conspiración Crónica (*El Diario*, viernes 23-IX-1892), reproducido completo en el Apéndice D-I.
- <sup>9116</sup> Grapho, seudónimo de un militar, Conspiración Crónica (*El Diario*, viernes 23-IX-1892), reproducido completo en el Apéndice D-I.
- <sup>9117</sup> Sobre el fuero militar, ver Rattenbach, 1958, 89-95. Ver el caso del Juez de Instrucción Militar Alfredo Betoño (AGE-Leg.1828); y el de José Fernández de Castro sobre el Fuero Militar (AGE-Leg.4487).
- <sup>9118</sup> Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 2005. Sobre las contradicciones entre el fuero militar y el poder político en el Virreinato del Río de la Plata, ver Saguier, 1994.
- <sup>9119</sup> ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio Moyano Gacitúa, el Comandante de un Distrito Militar "...no puede suspender el auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo .....do de la misma dice: "Hay una clara distinción entre la suspensión del writ of habeas corpus en el sentido de la Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la suspensión ipso facto que ocurre en todas partes donde rige la ley Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la guerra, i existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las necesidades de la guerra. Su aplicación

---

solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del empleado son lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades civiles i a casos surgiendo dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la Ley Marcial. Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de toda forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de traba a este poder discrecional a que aspira”, i que se refleja en la actitud del oficial en cuestión; no obstante ello, la persona de los miembros del ejército i aun cuando están desempeñando funciones de sus superiores, no están fuera del alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que no sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por delitos comunes; siendo también simples particulares respecto a la jurisdicción disciplinaria de los jueces cuando no estén amparados sus actos por la ordenanza militar i observan el respeto debido a las autoridades”. (Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Corrección Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, reproducido en Apéndice J-II). Moyano Gacitúa era el autor de un escrito titulado “La pena de penitenciaría y el proyecto de Código Penal”, publicado en 1895; y del “Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino”, publicado en 1899.

<sup>9120</sup> ver del Apéndices D-VII al D-XII y del D-XV al D-XVIII. Sobre el alumno Saturnino Castilla, convicto del conato de crimen nefando, “asqueroso vicio del que ni una sospecha debe tener lugar en el Colegio Militar”, ver Apéndice D-XVI. Sobre el acto inmoral cometido por los alumnos de la misma: Dn. Adolfo Lemos, Dn. Enrique Segarra, y Dn. Ernesto Silveira, ver Apéndice D-XVII.

<sup>9121</sup> ver Apéndices D-XVI y D-XVII. En la subdirección del Colegio se encuentra el expediente relacionado con el escándalo de orgía homosexual de 1942.

<sup>9122</sup> ver Apéndices D-XVI, D-XVII y D-XIX. A la 1 p.m. del 12 de agosto de 1877 “...se mandó al Estacionario en calidad de preso el cadete del Colegio de Palermo Roberto Larger” (AGN, Sala X, 36-11-18, folio 76). En 1876 se presenta un Proyecto de Reglamentación y régimen interno del Depósito Correccional de menores para marineros (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1876, 345-361).

<sup>9123</sup> Por decreto del 31 de enero de 1882 se cambió la denominación de la Capitanía General de Puertos por la de Prefectura Marítima -siendo en consecuencia la primera oportunidad en la que aparece la denominación Prefectura- y en 1894 por la de Prefectura General de Puertos. Mansilla continuó con suma eficacia en el cargo de Prefecto Marítimo, luego Prefecto General de Puertos, hasta septiembre de 1895.

<sup>9124</sup> Encargado del Depósito Correccional de Menores Juan B. Zunzunegui al Jefe de la Capitanía Central del Puerto Dr. Diego G. de la Fuente-- (*La Prensa*, Domingo 22 de abril de 1877), reproducido íntegro en el Apéndice D-X.

<sup>9125</sup> A raíz de un sumario, las autoridades del Colegio tomaron conocimiento de la existencia de una sociedad denominada “Los Chichones”, que “...imponía sus caprichos al resto de los alumnos y aquel que no acataba sus arbitrarias decisiones era sometido a una severa paliza” (Orden del Día del 11-IV-1877, citado en García Enciso, 1970, 124).

<sup>9126</sup> Ver la nómina de expulsados, en Listado L-II. El caso central que desató la intervención de las autoridades fue el del Aspirante Francisco Chouciño (6-4-A), quien sufrió una terrible paliza con la indiferencia de los Cadetes Carlos Soler (3-3-I), Pedro Wilches y Rómulo Olivieri (5-8-I), los que luego fueron sancionados (ver Apéndice D-VII). Si bien Wilches no se graduó y Olivieri no pasó de

---

Subteniente, Soler alcanzó el grado de Teniente Coronel.

<sup>9127</sup> García Enciso, 1970, 125.

<sup>9128</sup> ver para más detalles el Apéndice D-XIX, relativo al atentado de sodomía que pretendieron llevar a cabo los Aspirantes Don César Cerri y Don Felipe Goulú, contra los Aspirantes Carlos Alvarez, Ernesto Segarra, Alfredo Plot, Manuel Vega Segovia y Manuel Maciel (AGE, Leg.3035).

<sup>9129</sup> Sobre la choteada, ver Salessi, 2000, 267-268. Para el Sargento Mayor Francisco Smith hechos como el perpetrado por el cadete Cerri "...indigno e inhumano acto", merecen "...un ejemplar castigo para cortar de raíz tan abominable inclinación y mas para el que viste el honroso uniforme militar" (AGE, Leg.3035, fs.2).

<sup>9130</sup> Cuando la rebelión del 80 "...el Capitán Julio Peralta Martínez era Habilitado de este Colegio Militar y entonces abandonó su puesto, llevándose fondos y libros que le estaban confiados por el cargo que desempeñaba", Palermo, IV-84 (AGCMN, LCN, No. 12, folio 36). Lo que es aún peor, al Capitán Habilitado "...lo siguieron cinco cadetes" (MMGyM, 1881, II, 287). Arturo Lugones (12-6-I) era "...un alumno sobre el que pesa la mancha de la desertión en la rebelión de 1880 y el que más tarde fue uno de los más comprometidos en el motín que tuvo lugar en este Colegio el 6 de septiembre de 1882", Santa Cruz a Joaquín Viejobueno, Palermo, 21-IV-1883 (AGCMN, LCN, No.11, 263). Pese a ello Lugones hizo una carrera exitosa pues se graduó y luego alcanzó el grado de General de Brigada. Los acontecimientos políticos del 80, que conmovieron al país, "...obligaron a alejar del Colegio a los alumnos bajo las órdenes del Subdirector y oficiales" (MMGyM, 1881, XXIX). En dicha oportunidad se resolvió ir de campamento a la Isla de Martín García.

<sup>9131</sup> ver Martínez, 1890, 204.

<sup>9132</sup> García Enciso, 1970, 87. Para el rol de las bandas de música militares en la construcción del estado argentino (1880-1910), ver Cejas, 2005.

<sup>9133</sup> AGCMN, Orden del Día del 14-I-1876 (García Enciso, 1970, 113).

<sup>9134</sup> Uno de los prostíbulos más frecuentados por los cadetes se encontraba en el cruce de las calles Lavalle y Talcahuano, ver Carretero, 1998, 130.

<sup>9135</sup> Para acceder a la boca del Arroyo Maldonado era preciso atravesar las vías del Ferrocarril del Norte, circuito que estaba vedado a los alumnos del Colegio, justamente por estar fuera del control óptico de los imaginarios.

<sup>9136</sup> En el viaje organizado a la Isla de Martín García, ubicada en el estuario del Río de la Plata, el Aspirante Alfredo Plot denuncia que hubo casos de sodomía (AGE, Leg. 3035, fs.26). A su vez, García Enciso (1970) cuenta que dicho viaje, ocurrido en 1880, lo fue en dicha Isla "...durante diez días con dos tormentas de agua y viento huracanado que los transcurrieron en las carpas". (García Enciso, 1970, 138). El Aspirante Plot "...sabía por Segovia, que Maciel tenía una cita con este para efectuar el coito a proposición de Maciel" (AGE, Leg.3035, fs.25).

---

<sup>9137</sup> ver Apéndice D-XXIV.

<sup>9138</sup> ver Yuste, 2002.

<sup>9139</sup> Hernández, 1995, citado en Figueroa Perea, 2005, 48. Consultar también La Cecla, 2004.

<sup>9140</sup> ver Huneeus e Isella, 1996.

<sup>9141</sup> Según la declaración del Aspirante Carlos Alvarez, "...intentaron lo mismo con el Aspirante Segarra al cual Cerri volteó al suelo haciendo el ademán de efectuar el coito" (AGE, Leg.3035, fs.7). También "...intentaron desprenderle los pantalones, pero que ignora la intención, por cuanto no pasó más adelante; pero que si sabe por habérselo dicho el Aspirante Segarra, que cuando Cerri lo echó al suelo a este, le pasó el miembro por entre medio de las piernas" (AGE, Leg.3035, fs.8). Según el Aspirante Manuel Maciel, "...Cerri lo tomó al Aspirante Segarra, y lo volteó en la orilla, tomándolo de las piernas que se las alsaba" (AGE, Leg.3035, fs.10). Según Segarra "...viendo que no podía conseguir su intento que era forzarlo, lo dejó para ir a tomar a Segovia" (AGE, Leg.3035, fs.14). En la ampliación de su declaración indagatoria, Segarra manifiesta "...que cuando el Aspirante Cerri lo volteó, y lo tenía boca abajo, le pasó el pene repetidas veces por entre las piernas" (AGE, Leg.3035, fs.20). Y Plot declara "...que cuando Cerri corría a Maciel le pareció entrever intención maliciosa" (AGE, Leg.3035, fs.27).

<sup>9142</sup> Sobre la pederastía en la Grecia Antigua, ver Fatás, 1971.

<sup>9143</sup> El Aspirante César Cerri, quien seguramente por ser el último en ser indagado tuvo oportunidad de ser convenientemente asesorado, manifiesta que "...como ha dicho mas antes no lo llevaba mas objeto que el de chacotear, y que estas bromas de mano era la primera vez que las daba a los mencionados, que le extraña sobremanera le hayan dado un carácter contrario al que tenían, máxime que cuando regresaron del río, el declarante, Segovia y Segarra lo hicieron en la mejor armonía sin que ninguno de estos le hiciese la más mínima manifestación de desagrado, que el se inclina a creer que los Aspirantes que se quejaron hayan sido inducidos por otros (AGE, Leg.3035, fs.35). Por el contrario, el Aspirante Segarra declara que "...respecto a lo que estos les hacían a los Aspirantes Alvarez, Segovia y Maciel, las consideraba como una broma grosera; pero no así lo que le habían hecho a él, que lo creía una cosa formal [sic]" (AGE, Leg.3035, fs.15).

<sup>9144</sup> Sobre la clandestinidad homosexual, ver Pollak, 1987, 75.

<sup>9145</sup> En cuanto a la verosimilitud de la intención maliciosa o elemento de dolo en el delito perpetrado, el Aspirante Enrique Segarra manifiesta que "...cuando deseaban regresar se lo impedían Cerri y Goulú con objeto de que vinieran juntos, pudiéndose escapar el Aspirante Alvarez, a quien Cerri ofreció darle de bofetadas si daba cuenta de lo ocurrido" (AGE. Leg.3035, fs.15).

<sup>9146</sup> El escribano designado en el sumario fue Arturo Orzábal. Debo esta observación a la perspicacia y experiencia en el tratamiento de estos casos de la psicoanalista Marta Ainsztein.

<sup>9147</sup> César Cerri pertenecía a la 10ª Promoción, ingresó en 1878, y se graduó en 1884 como 14º en el Orden de Mérito. En la ampliación de su declaración el Aspirante Enrique Segarra manifiesta que "...cuando el Aspirante Cerri lo volteó, y lo tenía boca abajo, le pasó el pene repetidas veces por entre las piernas" (AGE, Leg. 3035, fs.20). El testigo Carlos Alvarez manifestó que "...en estas circunstancias vino Cerri, lo agarró y lo echó al suelo, dejándolo en seguida para dar lugar a que Goulú se le echase encima (AGE, Leg.3035, fs.7).

---

<sup>9148</sup> Alfredo Plot fue dado de baja primero el 19 de julio de 1881, y definitivamente el 31 de enero de 1882 (MMGyM, 1882), y posteriormente se dedicó a la zoología, al extremo de haber sido el primer Director del Jardín Zoológico de La Plata, provincia de Buenos Aires (debo esta interesante información biográfica a Alex Méndez). Manuel Vega Segovia ingresó al Colegio Militar en 1880, egresó en 1884 como noveno en Orden de Mérito entre cuarenta egresados, alcanzó el grado de Teniente 1º, participó de la represión de las tropas radicales en la batalla de Ringuelet, y falleció a los 40 años de edad en 1904. Vega era nieto del Coronel Nicolás Vega, Gobernador de San Juan en 1830, sobrino carnal de los Tenientes Coroneles Augusto e Ignacio Segovia, y sobrino político de José Avelino Aramayo, refundador de la Minería Boliviana. Manuel Maciel era oriundo de Chascomús, hijo de Manuel Maciel y Aurora Superí. Entre los camaradas de Promoción del Cadete Cerri que alcanzaron notoriedad podemos mencionar a los Generales Tomás Vallee, Martín José Rodríguez y el Dictador José Félix Uriburu. De Enrique Segarra nada he podido averiguar salvo que pedía permiso para pasar las vacaciones al Pueblo de Ranchos (AGCMN, LCN. No.11, folio 224).

<sup>9149</sup> César Cerri pertenecía a la 10ª Promoción, y los Aspirantes Plot, Vega, Alvarez y Segarra a la 16ª Promoción.

<sup>9150</sup> García Enciso, 1970, 137.

<sup>9151</sup> García Enciso, 1970, 137.

<sup>9152</sup> La muerte temprana podía obedecer a enfermedades, epidemias, y accidentes mortales tales como orden cerrado, ejercicios gimnásticos y maniobras militares. El primer cadete inmolado fue el Aspirante Metrovio Garrido, que motiva la instrucción de un sumario (AGCMN, Orden del Día, 22-II-1875, citado en García Enciso, 1970, 109). Trece años más tarde, el 23 de setiembre de 1888, en medio de un curso en un aula, el Cadete Ricardo Remedi mató accidentalmente con un revolver que llevaba oculto al Cadete Prudencio del Castillo (García Enciso, 1970, 162). Pero a los accidentes no eran inmunes ni siquiera los profesores. El 22 de mayo de 1882, y como consecuencia de unas pruebas con un cañón fabricado en el Parque de Artillería, fallecía el profesor de la asignatura Fortificaciones Sargento Mayor Cesáreo Domínguez (García Enciso, 1970, 144). Para los detalles del accidente mortal que costó la vida del Mayor Domínguez, ver el Legajo personal del Comandante Domingo Viejobueno (AGE, Leg.13.688). En la célebre novela La Ciudad y los Perros del ex cadete Mario Vargas Llosa sucede algo similar en el Colegio Leoncio Prado, donde el cadete Arana fallece como consecuencia de un aparente error de tiro. Sin embargo, Vargas Llosa oculta la existencia de acosos sexuales.

<sup>9153</sup> Salessi, 2000, 268.

<sup>9154</sup> El Cadete César Cerri ensaya como estrategia de autodefensa el sarcásticamente denominado "ventilador", pues denuncia como "...afectos a representar el papel de mujer, por efectuar el coito, y que como un ejemplo puede citar los Aspirantes Julio Timoteo García, José María Rosendi, Manuel Larre, Carlos Wappers, Fernando Beret y Juan José Búcar"; pero que fue "...testigo ocular de un solo caso que se efectuaba hace tiempo, un sábado como a las tres de la mañana, entre el cabo José Elías Martearena y el aspirante Carlos Mallo, haciendo el último de mujer" (AGE, Leg.3035, No Microfilmado, fs.35v. y 36). En cuanto a Rosende o Rosendi, el acusador Aspirante Alfredo Plot confirma lo alegado por Cerri y agrega: "...Que lo ha oído a muchos,

---

recordando en este momento por haberlo oído con más frecuencia a los Aspirantes Jacinto Pizarro y Pedro Ferreira, que respecto a los autores ignora y que ha oído decir que el hecho fue verificado en Martín García" (AGE, Leg.3035, fs.26). Fernando Beret ingresó al Colegio Militar en 1880, egresó en 1884 como 13° en Orden de Mérito entre cuarenta egresados, llegó a Teniente Coronel y falleció en 1902 a los 36 años de edad (AGE, Leg.1735). José Horacio Rosendi era primo hermano de Julio Timoteo García, nació en Buenos Aires en 1868, ingresó en 1880 en la Promoción 12ª, egresó en 1886, se retiró de Mayor en 1906, y falleció en 1924 a los 56 años de edad. Al momento de egresar César Cerri del Colegio Militar ingresaba Juan Comas, quien a la postre resultó ser el Mayor Comas, el mismo que en 1906 como integrante de la Escuela Superior de Guerra ultimó al Capitán Arturo Macedo e intentó vanamente suicidarse en un aparente escándalo pasional (Salessi, 2000, 363-372; y AGE, Leg.3155); debemos señalar que el expediente correspondiente al sumario respectivo desapareció). Posteriormente, en la primera presidencia de Yrigoyen, Comas fue designado Director del Archivo General de la Nación (Etchepareborda, 1968, 217, nota 44). Bazán (2004) reproduce en su libro el retrato de ambos (Bazán, 2004, 165). Comas era hijo del Jefe Político de Paraná (Entre Ríos) y Senador Provincial Domingo Comas (1883). Más luego, a fines de 1942, se desató el famoso escándalo de los cadetes del Colegio Militar con conocidos homosexuales de la noche porteña y que fueron procesados por el Juez Narciso Ocampo (Salessi, 2000, 362; y Bazán, 2004, 219-224). Parece ser que la mujer que actuaba de anzueto era Zully Moreno, mujer del dueño del Teatro Maipo Luis César Amadori, y que uno de los cadetes dado de baja con ese infausto motivo fue el hijo de Rubén Darío (El expediente correspondiente con todas las fotos se encuentra en la Subdirección del Colegio Militar, pero su acceso es restringido).

<sup>9155</sup> Hijo del Guerrero del Paraguay Mayor Estéban Chouciño (? - 4/1/1871) [A.G.E. 3626]. Para los casos anteriores a su promoción, el Aspirante César Cerri alegaba que "...pueden ser informados mejor por el cabo [Aquiles Enrique] Suluaga y el cadete [Rogelio] Tristany" (AGE, Leg.3035, No Microfilmado, fs.35v. y 36). El eventual testigo Aquiles Zuloaga (7-13-I) nació en Mendoza en 1857, ingresó en 1875 en la Promoción 7ª, se graduó en 1880 como 13° en el Orden de Mérito entre un centenar de egresados, alcanzó el grado de Teniente Coronel y falleció en 1898 a los 41 años de edad. Junto a Zuloaga se graduaron el Teniente General Ramón Jones (7-3-A), el General de División Proto Ordóñez (7-7-I) y el Teniente Coronel Carlos Wappers (7-12-I). Y el otro eventual testigo Rogelio Tristany (6-6-C) nació en Santa Fé en 1859, hijo del un afamado juriconsulto, educador y periodista catalán llamado Manuel Rogelio Tristany y de Pilar Blanco; ingresó en 1873 en la Promoción 6ª y egresó en 1879 como 6° en el Orden de Mérito entre una veintena de egresados, alcanzando el grado de Capitán, y falleció en 1883 a los 24 años de edad en la campaña del Desierto (Figuerola, 2001). Es decir, quienes podían atestiguar la existencia de casos de sodomía en el Colegio Militar podían remontarse a la sexta Promoción, la misma que perteneció al fundador de la Escuela Superior de Guerra, General Pablo Riccheri, y al Coronel Benjamín Calvete, conspirador radical en 1904.

<sup>9156</sup> Entre los cadetes implicados en este escándalo que no alcanzaron a graduarse figuran Alfredo Plot, Carlos Álvarez y Enrique Segarra, siendo estos dos últimos los únicos que elevaron la queja contra el Aspirante Cerri que dio lugar al sumario. Por cierto, las autoridades del Colegio resolvió dar de baja al Cadete César Cerri (Orden del Día de 9 de marzo de 1881-AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No. 3, folio 277). También fueron dados de baja los Aspirantes cordobeses Jacinto Pizarro y Pedro Ferreira mencionados en su testimonio por el cadete Plot. Parece ser que en la Escuela Naval también ocurrían estos casos, y generalmente cuando eran dados de baja Aspirantes cuyos apellidos comenzaban con igual letra, se sospechaba que obedecía a estas causas por cuanto las literas de la cuadra estaban asignadas

---

por orden alfabético (comunicación personal de un colega que me pidió reserva de identidad).

<sup>9157</sup> Rawson fue padre del General Franklin Rawson, líder del golpe de estado de 1943, acontecido un año después de haber estallado el último escándalo conocido de los cadetes del Colegio Militar (1942).

<sup>9158</sup> *La Prensa*, 1-IV-1882, n.3714, col.6, citado en García Enciso, 1970, 137 y 138, y reproducido en el Apéndice B-II. Cuando empezaron los ataques "...injustos y bruscos que *La Nación* me ha dirigido y los que obedecen a miras políticas, sentí algunos síntomas que me hicieron comprender que las Compañías habían sido tocadas, pues que se encontraron escritos en las paredes los letreros "Viva el partido liberal", "Muera Santa Cruz" (Apéndice D-XX)

<sup>9159</sup> Coronel Simón de Santa Cruz a la Comisión Examinadora del Colegio Militar de la Nación, Palermo, 1 de diciembre de 1882 (MMGyM, 1882, 68). Ver también los Apéndices D-XX y D-XXIII.

<sup>9160</sup> Entre los castigados se encontraban Rualdo Coronel, Antonio Jiménez, Carlos Mallo, Estéban García, Manuel Roldán, Estanislao López, Manuel Rawson, Rómulo Olivieri, Manuel Vega, José M. Castro (Apéndice B-III). Mallo y Vega ya habían sido denunciados por los Aspirantes Cerri y Plot como partícipes en actos de sodomía (Apéndice D-XIX). Es interesante observar que del Libro No.11 del Copiador de Notas del Colegio Militar fueron arrancados con navaja dos folios. El primero, correspondiente a un documento registrado entre el 11 de mayo y el 23 de mayo de 1883, fue arrancado antes que el libro fuere foliado, y el otro después de dicha foliación, pues falta el documento del 5 de septiembre de 1882, registrado entre los folios 47 y 49.

<sup>9161</sup> Levine y Pavelchak, 1985, II, 64.

<sup>9162</sup> Apéndice D-XXIII.

<sup>9163</sup> Ver Apéndices D-XXI y D-XXII. El Decreto suspende el viaje de Instrucción, rebaja a la clase de tropa a los sargentos, cabos y distinguidos, y pone bajo severa vigilancia a los cadetes Jiménez, Rawson, Mallo, José María y Bernabé Castro, Manuel Vega Segovia, Rómulo Olivieri, Oliveira, Lemos, Reybaud, y Carlos Moret (Legajo Personal de Manuel Lino Francisco Rawson, AGE, Leg.10.760). En Junio de 1885, Santa Cruz informa que los Aspirantes Estéban García y José M. Castro Sundblad, "...después de encabezar un motín en el Colegio contra sus Superiores, pasaron dos meses presos en el Retiro y los que en el mismo día que volvieron al Colegio y que eran perdonados por la Superioridad cometieron la gravísima falta de faltar nada menos que al Sr. Jefe del Estado Mayor General cuando les dirigía la palabra, razón por la que fueron en el acto expulsados del Colegio. Al poco tiempo estos jóvenes que comprendieron todo el alcance de su falta mostraron su arrepentimiento solicitando gracia y la Superioridad les concedió". (Coronel Simón Santa Cruz al Ministro de Guerra, Palermo, 16-XI-1885, AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 277).

<sup>9164</sup> Procedimientos Sumarios instruidos en el Colegio Militar en 1886 contra los aspirantes de la segunda compañía Juan C. Huergo y Manuel Padilla acusados del delito de Injurias. Juez Fiscal Teniente 2º César A. Fortunato, Escribano Cabo 1º de la Primera Compañía Ernesto M. Aguiar. El Sumario fue instruido por "...haber escrito en uno de los calabozos del Colegio varias expresiones obscenas alusivas a la persona del Capitán de la segunda compañía del Colegio Militar Dn. Rómulo Páez". (AGE, Leg.10.326, fs.8-8v).

<sup>9165</sup> Una vez dados de baja del Colegio Militar, Manuel Maciel y más luego Juan C. Huergo, se las ingeniaron para que los dieran de alta en la Escuela de Cabos y Sargentos (MMGyM, 1884-85, 196-99).

---

<sup>9166</sup> ver Cáceres y Rosasco (2000), citado en Figueroa Perea, 2005, 53.

<sup>9167</sup> César Cerri pertenecía a la 10ª Promoción, llegó a Coronel y era sobrino del en ese entonces Teniente Coronel y luego General Daniel Cerri. Felipe Goulú era hijo o hermano del Inspector de Ferrocarriles Nacionales Julio F. Goulú, y nieto del célebre dibujante Jean-Philippe Goulú, y si bien solicitó la baja del Colegio Militar el 24 de agosto de 1881, fue dado de alta en el Ejército, institución donde alcanzó el grado de Teniente Coronel. Como Mayor participó como insurrecto en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.532), y cuando Teniente Coronel como oficial leal en la Revolución de 1905 acontecida en Mendoza (AGE, Leg.5704, y Lacoste, 1990, I, 33 y 43, nota 9). Manuel Maciel ingresó en 1881, fue dado de baja el 25 de octubre de 1881, de alta en la Escuela de Cabos y Sargentos en 1884, y nuevamente de alta en el Colegio Militar, lugar donde egresó en 1886 como penúltimo en Orden de Mérito, para alcanzar el grado de Teniente Coronel, retirarse en 1907 y fallecer a los 76 años de edad en 1935 (Figueroa, 2001). Fernando Beret perteneció a la Promoción 14ª, llegó a Teniente Coronel y falleció en 1902 a los 36 años de edad (AGE, Leg.1735). Junto con Cerri, Beret y Vega Segovia se graduaron el Teniente General Luis Dellepiane, el General de División Gregorio Vélez, y los Generales de Brigada Lorenzo Bravo y Salvador Martínez Urquiza. Carlos Wappers llegó a Coronel y fue Agregado Militar en Bélgica antes de la Primer Guerra Mundial, de cuya misión dejó un interesante Informe inédito (AGE, Leg.275). El salteño José Elías Martearena ingresó en 1877 en la Promoción 8ª, egresó en 1881 como 4º en el Orden de Mérito entre sólo cuatro egresados, y alcanzó el grado de Teniente Coronel, falleciendo en 1911 a los 50 años de edad. Mallo era hijo del Dr. Pedro Mallo, Profesor de Higiene Militar del Colegio, ingresó en 1879 en la 9ª Promoción, egresó en 1883 como 5º en Orden de Mérito entre catorce egresados, y llegó también a Teniente Coronel, falleciendo en 1900 a los 37 años de edad (Figueroa, 2001, 90 y 95). Fueron camaradas de Mallo en la Promoción 9ª los Generales de División Ramón María Ruiz, Ricardo Cornell y Antonio Claro Giménez; y el Coronel José A. Rojas, Agregado Militar en Alemania, quien dejara inédito un minucioso Informe (AGE, Leg.11.367).

<sup>9168</sup> Weber, 1944, I, 316.

<sup>9169</sup> Halperín Donghi, 1978, 125, nota 2, y 146.

<sup>9170</sup> (e.g.: Álvarez, Díaz, Domínguez, Fernández, García, Gómez, González, Gutiérrez, Hernández, Juárez, López, Martínez, Méndez, Muñoz, Núñez, Ortiz, Pérez, Ramírez, Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Suárez, Vásquez, etc.),

<sup>9171</sup> (e.g.: Cabrera, Castro, Costa, Crespo, Escobar, Figueroa, Flores, Herrera, Molina, Montes, Morales, Moreno, Moyano, Navarro, Ochoa, Ojeda, Palacios, Paz, Pereyra, Quiroga, Ramos, Ríos, Roldán, Romero, Rosa, Rubio, Salas, Saravia, Sarmiento, Silva, Soria, Solari, Torres, Varela, Vega, Vidal, Videla, Villafañe, Villegas, etc.).

<sup>9172</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.

<sup>9173</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.

- 
- <sup>9174</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9175</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9176</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9177</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>I</sup>
- <sup>9178</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9179</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9180</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9181</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9182</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9183</sup> Pasquín Dirigido a los Suboficiales s/Lucha de clases intestina (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice D-II.
- <sup>9184</sup> Sobre la política como continuación de la guerra por otros medios, ver Corn, 2006.
- <sup>9185</sup> Leandro Alem se había opuesto en Julio de 1890, una vez desatada la revolución del Parque, a la toma del Departamento Central de Policía y de la propia Casa de Gobierno, por considerar que la revolución era una demostración de protesta moral y de propaganda armada.
- <sup>9186</sup> Said, 1996, 414.
- <sup>9187</sup> Sobre la conspiración permanente de la facción Unitaria como parte integrante de la imaginación republicana del Rosismo, ver Myers, 1995, 52-57.
- <sup>9188</sup> En ese entonces circulaba el texto de Ordax Avecilla y Urrengochea (1879) y la prédica republicana de Fernando Garrido en España sobre insurrecciones y guerras de barricadas. La elite terrateniente se dividió ostensiblemente pues el emblemático Saturnino Unzué tomó partido por Roca y otros afamados terratenientes como Manuel Ocampo y Leonardo Pereyra Yraola lo hicieron a favor de la revolución.
- <sup>9189</sup> Canelas López (1983) distingue para Bolivia la rebelión de la revolución, el motín o sedición, la conmoción, la asonada, y el conato.
- <sup>9190</sup> Sobre conspiraciones y revoluciones y sus consecuencias, ver Rattenbach, 1958, 122-126.

- 
- <sup>9191</sup> En oportunidad de desatarse la revolución de 1905, el semanario Caras y Caretas dedicó dos números consecutivos de la revista para ridiculizar y patologizar el evento (Caras y Caretas, 11 y 18 de febrero de 1905).
- <sup>9192</sup> Rattenbach, 1958, 124.
- <sup>9193</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9194</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército (*El Municipio*-13-I-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.-
- <sup>9195</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército (*El Municipio*-13-I-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.-
- <sup>9196</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército (*El Municipio*-13-I-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.-
- <sup>9197</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército (*El Municipio*-13-I-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.-
- <sup>9198</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9199</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9200</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9201</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9202</sup> Leandro Alem repite la estrategia defensiva que el General José Inocencio Arias desplegó en la Revolución del 80, cuando se negó a atacar al Gobierno y al ejército nacional acampado en Chacarita (Gutiérrez, 1959, 243).
- <sup>9203</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9204</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9205</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9206</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9207</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9208</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II

- 
- <sup>9209</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9210</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9211</sup> Cuestión Jurídica Palpitante (*La Prensa*, 12 de febrero de 1905, p.3, col.4-5), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XIX.-
- <sup>9212</sup> Sobre el poder de la opinión en Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 83-90.
- <sup>9213</sup> sobre Florencio Varela y la prensa revolucionaria, ver Facchinetti de Alvarez, 1969/71 y Weinberg, 1970.
- <sup>9214</sup> Sarmiento con el grado de Teniente Coronel otorgado por el general Justo José de Urquiza utilizaba una rudimentaria imprenta de campaña que se transportaba en una carreta, y desde la cual se emitían los partes diarios.
- <sup>9215</sup> Caffentzis, 2002, 230.
- <sup>9216</sup> En el campo de la prensa (*El Municipio*-12-II-1891-p.1-col.1), reproducida en forma íntegra en el Apéndice E-XX.-
- <sup>9217</sup> Mendía, 1890, I, 37. Sobre el periodismo de Alvaro Pinto y la revolución del 90, ver Debenedetti, 1970. Sobre la nómina de otros periódicos revolucionarios, ver Botana, 1977, 205, nota 7. Sobre Manuel Láinez y el periodismo de su tiempo, ver Echagüe, 1944. Sobre Deolindo Muñoz, el director de *El Municipio*, ver Mikielovich, 1967. Muñoz fue un personaje inolvidable de las luchas políticas de ese tiempo, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, y en las redacciones de los diarios de todo el país, donde su periódico circulaba profusamente. Creo que una de las razones del silencio que se cernió sobre este combatiente de la pluma fue su antijudaísmo. Cabe aclarar que su antijudaísmo no era de naturaleza antisemita sino neotestamentaria o shakesperiana, al estilo de La Bolsa de Julián Martel, ver *El Municipio*, 3-III-1891, 27-VI-1891, 30-XII-1891, y 30-VII-1892.
- <sup>9218</sup> Mendía, 1890, I, 18, 53 y 73.
- <sup>9219</sup> La opinión extraña, *La Prensa*, miércoles 8 de febrero de 1905, p.3, col.6-7; Política Interna, *La Prensa*, sábado 11 de febrero de 1905, p.4, col.1-3; y Las Influencias de la Política, *La Prensa*, 15 de febrero de 1905, p.3, col.6-7. Al día siguiente de la revolución de 1905, el 5 de febrero, cuando aún no se sabía la verdadera dimensión del episodio y a diferencia de todos los demás diarios que debieron guardar silencio por la declaratoria de estado de sitio, *La Nación*, en su editorial, titulada “El Motín Fracasado”, toma partido a favor del gobierno, declarando que el acontecimiento no merecía “...el nombre de conjuración, mucho menos el de revolución, que implica responder a una inspiración política, al disenso responsable y confesable de tendencias de opinión. Reducida así a la proporción que le asigna su fracaso y su insignificancia, resulta más grotesca esta tentativa o parodia de sedición ahogada en la repulsión y vacío de opinión que condena a irremisible y ejemplar fracaso todo conato contra el orden y la paz públicos” (Ecos del Día-El Motín fracasado (*La Nación*-5-II-1905, p.5-col-5), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XVIII).
- <sup>9220</sup> *El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 7--año IV, n.940)
- <sup>9221</sup> *El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 7--año IV, n.940)

- 
- <sup>9222</sup> Los Boletines (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 7-año IV, n.940)
- <sup>9223</sup> Los Boletines (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 7-año IV, n.940)
- <sup>9224</sup> Los Boletines (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 7-año IV, n.940)
- <sup>9225</sup> sobre el periódico alemán *Vorwärts* y la acusación de desacato que cayó sobre el mismo, ver El Delito de Desacato, *El Municipio*, jueves 7-V-1891.
- <sup>9226</sup> El Director de *El Municipio* a la Corte Suprema (*El Municipio*-18-X-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXI.-
- <sup>9227</sup> Desde Buenos Aires. Incorrecto proceder de *La Prensa*. Lo que opina la Unión Cívica. Una Carta Enérgica. (*El Municipio*-24-III-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXII.-
- <sup>9228</sup> Sobre el periódico '*Sud-America*', 1884-1891, ver Duncan, 1980.
- <sup>9229</sup> *El Diario* había adoptado como modelo a *Le Figaro*, diario parisino donde los periodistas firmaban con seudónimo (Canter, 1930, 48). Láinez solía firmar sus artículos con diversos seudónimos, entre ellos el de Argos y el de Sam Weller. Falleció el 4 de marzo de 1924, despidiendo sus restos Vicente Gallo, Francisco Uriburu, Carlos Zabala y Julio A. Costa, quien para caracterizar su personalidad manifestó: "que donde Láinez se sentaba estaba la cabecera de la mesa" (*La Prensa*, 4-III-1924).
- <sup>9230</sup> Tassi fue autor de un libro titulado **El Oficial en campaña**.
- <sup>9231</sup> Últimamente, al descubrir artículos anónimos en *El Diario*, correspondientes al mes de abril de 1900, dedicados a la Escuela Superior de Guerra, cuando ya Lamas había fallecido, me inducen a pensar que la persona detrás de los seudónimos y de las editoriales anónimas podría haber estado Castro Sundblad. *El Diario* de Láinez estaba totalmente a favor de la creación de la Escuela Superior de Guerra, y el propio Castro Sundblad, que entendía el alemán, asistía como oyente a los cursos dictados por oficiales prusianos en dicha Escuela (Picciuolo, 2000, 71). Con admiración por el profesionalismo y la disciplina germanas, Castro Sundblad había experimentado, al igual que otros muchos oficiales que habían estado con Alem y Bernardo de Irigoyen, una profunda inversión ideológica, pues en oportunidad de la Revolución de 1905, los cívicos Alejandro Witcomb, Luis Roque Gondra, Valentín Vergara y Agustín Rocca tuvieron como misión a pedido de los oficiales del Regimiento 2° de Infantería, sito en Bahía Blanca, la de impedir que su Comandante José M. Castro Sundblad --a quien apreciaban y que tenía un hijo enfermo de tifoidea-- saliera de su casa (Gondra, 1945, 57; y Etchepareborda, 1968, 257-258). Como corolario de la toma del regimiento, que terminó sangrientamente en la estación Pirovano, Agustín Rocca fue asesinado conjuntamente con dos oficiales y cuatro civiles radicales (Etchepareborda, 1968, 259). El Ministro Riccheri trasladó a Castro Sundblad a una unidad de infantería sita en el Territorio Nacional de Santa Cruz (Participación del fallecimiento del Teniente Coronel Castro Sundblad por el Regimiento 2° de Infantería de Línea, *La Prensa*, 1-III-1907).
- <sup>9232</sup> Sobre el Mayor Diego Luis Lamas, ver Apéndice B-XXX; Mendiá, 1890, 14, 21, 25 y 36; y Rodríguez, 1964, 89. Lamas era hijo del General Diego Eugenio Lamas, viejo adversario de Venancio Flores, y nieto materno del partidario de Oribe, General Manuel Delgado. No tenía

---

parentesco alguno con Andrés Lamas, pero ambas familias eran de un común origen gallego. Y en cuanto a Castro Sundblad, participó activamente de la Revolución del 90, y en los eventos revolucionarios de 1893 estuvo entre quienes los oficiales que enfilaron para La Plata (P.R., 1913, 211). En el reportaje al Coronel Espina de 1925, este último refiere que cuando estuvo a punto de sublevarse contra Roca en su segunda presidencia --cuando se trataba la unificación de la deuda externa del país-- Castro Zumbblad por Castro Sundblad fue uno de los pocos que se solidarizaron con su postura (*Crítica*, 3-XI-1925, p.9 y 10; 4-XI-1925, p.9; y 5-XI-1925, p.9).

<sup>9233</sup> En la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, el microfilm de *El Diario* correspondiente al año 1893 se encuentra trunco desde fines de febrero, y en la Biblioteca Nacional todos los ejemplares anteriores a 1900 han sido retirados de circulación. En el complejo bibliotecológico existente en Parque España de la ciudad de Rosario pude consultar el microfilm correspondiente a dicho año del periódico *El Diario*.

<sup>9234</sup> Carlos Vega Belgrano nació en Buenos Aires en 1858. Era hijo de Manuel Vega Belgrano y nieto de Manuel Belgrano. Estaba casado con su prima hermana Manuela Mónica Belgrano. Como periodista participó de la fundación de *El Federalista*, *La Actualidad*, *La Revista de la República*, *Revista Literaria*, y la *Revista del Plata*. Partió a Europa en 1877 volviendo quince años después, en 1891. En Europa fue oyente de la Escuela de Ciencias Políticas de París y de las Universidades de Heidelberg y de Bonn. En Hamburgo publicó dos volúmenes de Pensamientos (1890). Al reintegrarse a su patria en 1891, fundó *El Tiempo*, empresa en la cual gastó su fortuna personal y que cerró sus puertas en 1912. En su diario, que Cútoló equivocadamente da por fundado en 1904, cuando en realidad lo fue en 1894, Vega Belgrano transcribía traducidos al español importantísimas notas de diarios especializados de Europa, tanto del francés, del inglés, del italiano, del alemán, como del ruso. Gracias a su apoyo material Rubén Darío pudo editar *Prosas Profanas*. Falleció el 19 de abril de 1930, y hablaron en la despedida de sus restos Francisco de Veyga, Juan Carlos Garay, Enrique C. Urien, Raúl Sánchez, Alberto Palomeque y Carmen S. de Pandolfini. La revista *Nosotros* de Giustu y Bianchi le dedicó una parte del número de abril de 1930 (Cutolo, VII, 537).

<sup>9235</sup> Las armas y municiones empleadas por los revolucionarios orientales "...tenían el sello del Parque Nacional Argentino y también portaban uniformes de brin cuyos botones exhibían el escudo argentino. La cancillería argentina ofrece como explicación que todo ese material había sido sustraído del Parque por integrantes de las revueltas de Corrientes y Santa Fe de 1892 y 1893, y vendidos a los revolucionarios orientales" (Arocena Olivera, 1988, 147).

<sup>9236</sup> Fernández Saldaña, 1945, 689; y Maiztegui, II, 171 y 183.

<sup>9237</sup> Arocena Olivera, 1988, 163. Sobre la representación de las minorías que Hipólito Yrigoyen aconsejó a Roque Sáenz Peña, ver Frontera, 1968; y Cantón, 1973, 96 y siguientes, citado en Botana, 1977, 280 y 290, nota 66.

<sup>9238</sup> Huntington, 1995, 81.

<sup>9239</sup> Sobre la logia militar de la revolución del 90, ver Mendiá, 1890, I, 21; y acerca de la designación de la Junta Ejecutiva y el Tribunal de Honor, ver Mendiá, 1890, I, 22. Sobre que la logia

---

militar exige en Julio de 1890 la designación de un Jefe militar de la Revolución, ver Balestra, 1935, 138-141 y 160-161; y Etchepareborda, 1968, 52.

- <sup>9240</sup> Esta Junta estaba compuesta por los Coroneles D. Manuel J. Olascoaga, D. Martín Irigoyen, Teniente Coronel D. Sandalio Sosa, Mayores D. Manuel J. Guerrero, D. Francisco Vigo y marinos Teniente de Navío D. Juan Pablo Sáenz Valiente y Alférez de Navío D. Hilario Ybarra (Coronel Manuel J. Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro [AGE-Leg.5828], reproducido en Apéndice E-I).
- <sup>9241</sup> sobre el control civil del poder militar, ver Rattenbach, 1958, 127-132.
- <sup>9242</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I. Sin embargo, cabe sospechar para esta época de la sinceridad del compromiso revolucionario del General Napoleón Uriburu, cuando hemos hallado en capítulos previos de esta obra, como dicho General no trepidó en Formosa (1891) en fusilar al soldado Julián Bargas, acusado de conspirar en conato sedicioso.
- <sup>9243</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9244</sup> Mendía, 1890, I, 26.
- <sup>9245</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9246</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9247</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9248</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9249</sup> Sobre el desempeño del Mayor Manuel J. Guerrero en Buenos Aires y en Santa Fé, ver Etchepareborda, 1968, 183, 197, 226 y 229. Guerrero era nacido en Mendoza en 1860, hijo de Manuel Guerrero y de Pantaleona Luna, casado con Petrona Biedma, la cual era viuda de Pedro María Castro, y padrastro de Elena Castro Biedma. Fue Agregado Militar en España en 1908 (AGE-Leg.5828).
- <sup>9250</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I. Al mando del Regimiento 6 de Caballería, el Mayor Francisco A. Vigo se alzó en febrero de 1905 (Caballero, 1961, 107).
- <sup>9251</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.

- 
- <sup>9252</sup> Para un examen de la discursividad yrigoyenista, ver Padoan, 2002.
- <sup>9253</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9254</sup> Mendiá, 1890, I, 33.
- <sup>9255</sup> Coronel Manuel Guerrero al Ministro de Guerra Gral. Agustín P. Justo, Capital Federal, Febrero 11 de 1924 s/postergaciones por revolucionario y ascenso al grado superior en retiro (AGE-Leg.5828), reproducido en Apéndice E-I.
- <sup>9256</sup> Botana, 1977, 171; y Kohen, 1983, 79. En Brasil, de acuerdo con Celso Castro, "...la cultura da mocidade militar que fez nascer o golpe de 1889 era marcada pela predominância do mérito e das doutrinas científicas da época". Para los levantamientos populares en Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 410-411.
- <sup>9257</sup> Ya con motivo de los sucesos de 1880, los cadetes habían participado activamente en las diferentes batallas que tuvieron lugar (ver Gutiérrez, 1959, 280, 372 y 379).
- <sup>9258</sup> Ver plano de Buenos Aires, donde se marca con puntos negros una treintena de cantones. Alonso (2000), que no ha consultado la obra de Mendiá, titulada La Revolución y publicada el mismo año 1890, pretende reducir el número de civiles implicados a sólo 300 individuos, y el espacio geográfico comprendido en el hecho revolucionario a unas pocas manzanas (Alonso, 2000, 88 y 91).
- <sup>9259</sup> El Coronel César Lobo sostuvo "...guerrillas comprometidas en las primeras horas del mencionado día [26 de julio] contra los revolucionarios del Parque. En esa noche en el movimiento envolvente que efectuó el que firma con mil doscientos hombres a sus órdenes, cuyas fuerzas fueron distribuidas en acantonamientos, en la calle de Tucumán y Artes, Viamonte y Cerrito, Tucumán y Cerrito, Córdoba y Cerrito y el cantón de reserva Calle de Artes entre Córdoba y Viamont. El Coronel Lobo nos dirigió personalmente esa noche para situar convenientemente esta fuerza y batir el enemigo con ventaja para nuestra tropa. Donato Alvarez" (AGE, Leg.6922).
- <sup>9260</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-
- <sup>9261</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-
- <sup>9262</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-
- <sup>9263</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-
- <sup>9264</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-
- <sup>9265</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-

---

<sup>9266</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-

<sup>9267</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-

<sup>9268</sup> En el Retiro hasta las 11 a.m. del 27 (*El Municipio*, viernes 1-VIII-1890-p.1-columna 3-año IV, n.940), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVI.-

<sup>9269</sup> Los Tenientes Máximo Layera, Manuel Urizar y Enrique García, y el Capitán Manuel Roldán, perteneciente a la 9ª Promoción del Colegio Militar.

<sup>9270</sup> Capitán Luis Fernández, el Alférez Eusebio Ibáñez, y los Tenientes Estanislao López, pertenecientes a la 10ª Promoción, egresada en 1884; y Tomás Vallee, perteneciente a la 14ª Promoción, egresada en 1888.

<sup>9271</sup> ver Mendía, 1890. I, 265; y Balestra, 1935, 188. Para el caso de muchos cantones, Mendía refiere nombres y apellidos de muchos soldados, pero entre los cuales no he podido encontrar a ninguno de los que actuaron en Formosa.

<sup>9272</sup> Balestra, 1935, 187. La obra de Balestra funda su información fundamentalmente en la obra de José M. Mendía, quien fuera Secretario del General Manuel J. Campos, como lo demuestra las siete notas insertas en las páginas 131, 139, 147, 161, 163, 183 y 197, de su segunda edición de 1935.

<sup>9273</sup> Cuando la rebelión del 80 "...el Capitán Julio Peralta Martínez era Habilitado de este Colegio Militar y entonces abandonó su puesto, llevándose fondos y libros que le estaban confiados por el cargo que desempeñaba", Palermo, IV-84 (AGCMN, LCN, No. 12, folio 36). Lo que es aún peor, al Capitán Habilitado "...lo siguieron cinco cadetes" (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMyG], 1881, II, 287). Arturo Lugones (12-6-I) era "...un alumno sobre el que pesa la mancha de la desertión en la rebelión de 1880 y el que más tarde fue uno de los más comprometidos en el motín que tuvo lugar en este Colegio el 6 de septiembre de 1882", Santa Cruz a Joaquín Viejobueno, Palermo, 21-IV-1883 (AGCMN, LCN, No.11, 263). Pese a ello Lugones hizo una carrera exitosa pues se graduó y alcanzó el grado de General de Brigada. Los acontecimientos políticos del 80, que conmovieron al país, "...obligaron a alejar del Colegio a los alumnos bajo las órdenes del Subdirector y oficiales" (MMGyM, 1881, XXIX). En dicha oportunidad se resolvió ir de campamento a la Isla de Martín García.

<sup>9274</sup> Sobre la inconsulta participación de los alumnos del Colegio Militar en un homenaje a Mitre, ver Apéndice E-XII. Sobre Francisco Barroetaveña y sus escritos periodísticos que provocaron la convocatoria al acto del Jardín Florida, ver Cárdenas de Monner Sanz, 1890. Los alumnos de V año que participaron del acto del Jardín Florida acontecido en Junio de 1889 fueron el Sargento 2º D.Romualdo Coronel, aspirante Atanasio Iturbe (17-2-A), Alberto Rosende, Juan Monserrat (17-5-A), José BellonI (17-7-A), José M. Vecino (17-4-I), y el de 4º año cabo 2º Mariano H. Jurado (ver Apéndice E-XIV). El Teniente José M. Castro Sundblad fue uno de los líderes de la Revolución del 90, habiendo sido cuando Cadete conjuntamente con Estéban García cabeza de numerosos motines (Mendía, 1890, I, 14, 17, 18, 21, 22, 25 y 41; y Balestra, 1935, 139 y 147). Era hijo de José María Castro y de Isabel Sundblad, sobrino del Juez Enrique Sundblad

---

(el que según José Hernández habría enviado preso a la frontera al personaje imaginario Martín Fierro), y nieto materno de un inmigrante sueco, que vino al Río de la Plata junto con el padre de Oscar Liliedal. Tanto Tomás Vallee como Estéban García también habían sido los cadetes más rebeldes del Colegio.

<sup>9275</sup> ver Mendía, 1890, I, 91-92; y II, 28-30; y Etchepareborda, 1968, 66. Pedro Cenoz declara que siendo cadete del Colegio Militar (4° año y 18ª Promoción) "...tomó parte en esa revolución juntamente con otros camaradas del mismo establecimiento [Marcos Hermelo, Dalmiro Llopart, Ramón Tristany, Alejo Corian, Angel Benítez, Miguel Morel, Juan Coussinet, Alberto Rosende, Mariano Jurado, Roberto Nievas, Manuel Castilla, Octavio Fernández, Pedro de la Quintana, Esteban Badaro, José Luis Maglione, José Efraín Belloni, Bernardo Austerlitz, Domingo Allaria, Justo Pablo Rojo, José Vicente Salcedo, Victoriano Loza, Agustín P. Justo, Alberto Noailles, Santiago Vallee, Severo Toranzo, Emilio de Ipola, Nicandro Mouzo, Eleodoro Cros, José Pedro Marcilese, Juan Monserrat, etc. Alcanzando un total de 33 cadetes], apoderándose de las armas de la guardia [merced a que el Aspirante Pablo Saravia facilitara la operación]; e incorporándose a la columna revolucionaria, que formada en Palermo se dirigió a tomar el Parque, situado entonces en la plaza General Lavalle. En este cantón y punto principal de concentración y abastecimiento continuamos prestando nuestros servicios durante los días de combate hasta su terminación; y posteriormente fuimos arrestados y enviados a los pontones Vanguardia y Banco Chico y luego trasladados a la Isla Martín García, por acudir al Teatro Onrrubia (hoy Victoria) a recibir como los demás jefes y oficiales, la medalla y el diploma con que el pueblo nos honraba a todos los revolucionarios" (AGE, Leg.3011, f.282. Igarzábal, 1964, 493; y Rouquié, 1981, I, 132. Los nombres entre corchetes son de mi autoría). El General Domingo Allaria cuenta en su foja de servicios que cuando era alumno de 5° año del Colegio Militar [17ª Promoción] participó de la Revolución del 90 "...a las órdenes del entonces Mayor Ricardo Day y Coronel Mariano Espina con una sección de artillería 7,5 y un cañón de 13, servidas con tropas de la batería del entonces Teniente Gregorio Vélez del 1° de Artillería y algunos soldados del referido Regimiento que se fugaron del Hospital Militar con el suscripto" (AGE, Leg. 641, fs.3). Y con referencia a los cadetes del Colegio Militar que participaron del Jardín Florida, ver Apéndices E-XIII y E-XIV. Sobre los cadetes que cooperaron con el restablecimiento del orden, ver Apéndice E-XV.

<sup>9276</sup> ver Apéndice E-XVI.

<sup>9277</sup> El Apéndice E-XVII detalla la nómina de los fugados: aspirantes Marcos Hermelo, Dalmiro Llopart, ....del aspirante Ramón Tristany, Ángel Benítez, Miguel Morel, Pedro....., Juan Cousinet, Leandro Alem [h], Manuel S. Hernández, Enrique Méndez, y Pedro de la Quintana. Es de notar que Agustín P. Justo y su círculo de amigos, que habían participado de la Revolución del 90 y fueron amnistiados, evitaron seguir alimentando la imagen de revolucionarios y boicotearon el evento del Teatro Onrubia (Comunicación personal del General Isaías García Enciso).

<sup>9278</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-

<sup>9279</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-

<sup>9280</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-

- 
- <sup>9281</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-
- <sup>9282</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-
- <sup>9283</sup> La historia del Acuerdo (*El Municipio*-4-VII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIV.-
- <sup>9284</sup> Ver Richmond, 1989.
- <sup>9285</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el Apéndice E-XI.
- <sup>9286</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-XI. Sobre el éxodo del pueblo de Santo Tomé a San Borja, ver *La Nación*, 20 de enero de 1991, y Herrera, 1930, 50-51.
- <sup>9287</sup> *La Nación*, 28-VII-1891.
- <sup>9288</sup> ver Saguier, 1993.
- <sup>9289</sup> Przeworski, 1991, 69.
- <sup>9290</sup> Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio" (Andrenacci, 1997, 126).
- <sup>9291</sup> Los Judas de la Revolución (*El Municipio*-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-III.
- <sup>9292</sup> Los Judas de la Revolución (*El Municipio*-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-III.
- <sup>9293</sup> Los Judas de la Revolución (*El Municipio*-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-III.
- <sup>9294</sup> Los Judas de la Revolución (*El Municipio*-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-III.
- <sup>9295</sup> Los Judas de la Revolución (*El Municipio*-14-II-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-III. La carta del Gral. Campos donde le echa la culpa de la derrota a Alem fue publicada por *La Nación* el sábado 14 de febrero de 1891.
- <sup>9296</sup> Notas Editoriales (*El Municipio*-15-II-1891)
- <sup>9297</sup> Las declaraciones del Doctor Alem (*El Municipio*-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IV.-
- <sup>9298</sup> Las declaraciones del Doctor Alem (*El Municipio*-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IV.-
- <sup>9299</sup> Las declaraciones del Doctor Alem (*El Municipio*-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IV.-

- 
- <sup>9300</sup> Las declaraciones del Doctor Alem (*El Municipio*-14-IV-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IV.-
- <sup>9301</sup> Alem y del Valle en el Senado (*El Municipio*-21-V-1891)
- <sup>9302</sup> Alem y del Valle en el Senado (*El Municipio*-21-V-1891)
- <sup>9303</sup> Sobre la fórmula Irigoyen-Garro, ver Proclamación de sepultureros, en *El Municipio*, martes 18-VIII-1891.
- <sup>9304</sup> La política electoral (*El Municipio*-23-VIII-1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-V.-
- <sup>9305</sup> Alzamientos e Interpelaciones por Ralf (*Sud-América*, número suelto, viernes 3 de Junio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-V); y Etchepareborda, 1968, 127-132. Sobre el periódico *Sud-América*, ver Alonso, 2004.
- <sup>9306</sup> Alzamientos e Interpelaciones por Ralf (*Sud-América*, número suelto, viernes 3 de Junio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-V); y Etchepareborda, 1968, 127-132.
- <sup>9307</sup> Alzamientos e Interpelaciones por Ralf (*Sud-América*, número suelto, viernes 3 de Junio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-V); y Etchepareborda, 1968, 127-132.
- <sup>9308</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el Apéndice E-XI.
- <sup>9309</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el Apéndice E-XI.
- <sup>9310</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-XI. Sobre el éxodo del pueblo de Santo Tomé a San Borja, ver *La Nación*, 20 de enero de 1991, y Herrera, 1930, 50-51.
- <sup>9311</sup> Belloni, 1975, 218.
- <sup>9312</sup> Este repudio no alcanzaba a los Ministros Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez y Eduardo Costa (*El Diario*, 29 de agosto de 1890).
- <sup>9313</sup> Capitanes Jacinto Espinosa, Benjamín Estrada y Sebastián Balcarce y el Subteniente Guillermo Tornquist. Este último era hermano menor del banquero Ernesto Tornquist, y del músico Miguel Tornquist.
- <sup>9314</sup> Velazco, 1947, 78-79; y Etchepareborda, 1968, 121.
- <sup>9315</sup> Pedro Toscano (AGE-Leg.13.086) contaba con mucho prestigio, pues había combatido junto con Manuel Y. Córdoba (AGE-Leg. 3249) y Gualberto Ruiz (AGE-Leg.11.665) y Roque Sáenz Peña en la batalla del Alto de la Alianza y en el Morro de Arica, durante la Guerra del Pacífico (1879).
- <sup>9316</sup> *La Prensa*, 24-V-1891, p.8.
- <sup>9317</sup> Boletín del Día-Revolución de Córdoba-Nuevos Detalles-Excavaciones y objetos explosivos-Composición Política de los Revolucionarios (*La Prensa*, 26 de Mayo de 1891), reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-IV.
- <sup>9318</sup> *La Nación*, 22-V-1891; *La Prensa*, 24 de mayo de 1891, p.8; y 26 de mayo de 1891, p.4; Etchepareborda, 1968, 123; y Bischoff, 1995, 347.

- 
- <sup>9319</sup> Lo de Córdoba (*El Diario*, 23 de mayo de 1891), reproducido en su integridad en el Apéndice E-III.
- <sup>9320</sup> Lo de Córdoba (*El Diario*, 23 de mayo de 1891), reproducido en su integridad en el Apéndice E-III.
- <sup>9321</sup> La Ficción y la Verdad. Llamamiento al Dr. Del Valle: nuevo fracaso, *La Prensa*, 5 de julio de 1893, p.4, col.1-3.
- <sup>9322</sup> Otro Estallido-Revolución en Catamarca, por Jack (*Sud-América*, año VIII, no.2204, jueves 25 de Junio de 1891), reproducido íntegro en el Apéndice E-V; y Etchepareborda, 1968, 127-132.
- <sup>9323</sup> *El Diario*, jueves 25 de junio de 1891; y *La Nación*, 26 de Junio de 1891.
- <sup>9324</sup> La misión del interventor (*El Diario*, 3 de Julio de 1891), reproducido íntegro en el Apéndice E-IX.
- <sup>9325</sup> Hilos del ovillo (*El Diario*, 8 de julio de 1891), reproducido íntegro en el Apéndice E-X.-
- <sup>9326</sup> *El Diario*, domingo 28 y lunes 29 de junio de 1891; y lunes 6 de julio de 1891; y Noticias-Actualidades-La Revolución en Santiago-Muerte Política de Don Absalón. Triunfo de Gorostiaga (*Sud América*, año VIII, n.2207, Lunes 29 de Junio de 1891, reproducidos íntegros en los Apéndices E-VII y E-VIII).
- <sup>9327</sup> *La Prensa*, 30 de junio de 1891.
- <sup>9328</sup> Los sucesos de Corrientes, *Sud América*, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-XI; y Herrera, 1930, 55. El tendido del cable telegráfico entre Corrientes y Resistencia fue practicado en diciembre de 1889 (Informe del Inspector General Héctor A. Rojas, referente al lanzamiento de un cable en el Río Paraná, entre Corrientes y Resistencia, en Boletín Mensual de Correos y Telégrafos, n.23, 1889, p.1689).
- <sup>9329</sup> El Censor, 21 de Julio de 1891.
- <sup>9330</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9331</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9332</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9333</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9334</sup> Etchepareborda, 1968, 132.
- <sup>9335</sup> Entre ellos el Coronel Ricardo Amigorena, y los Mayores del 9 Juan A. Cambiaso, Pablo Solari, Juan B. Ocampo y Manuel Manrique, y otros oficiales del Batallón 5° (AGE, Leg.8213).

- 
- <sup>9336</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9337</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVII.
- <sup>9338</sup> Etchepareborda, 1968, 133 y 135.
- <sup>9339</sup> Para una analogía con la antigüedad clásica, ver La Muerte del General Mitre. Un drama político de la antigüedad, en **El Municipio**, jueves 4 de junio de 1891.
- <sup>9340</sup> Acuerdos, Desacuerdos e imposiciones (**El Municipio**-4-XII-1891)
- <sup>9341</sup> Risas y lágrimas (**El Municipio**-16-II-1891-p.1-col.1).
- <sup>9342</sup> Etchepareborda, 1968, 138.
- <sup>9343</sup> Etchepareborda, 1968, 139. Sobre Luis Sáenz Peña y la evolución de los católicos, ver **El Municipio**, viernes 26 de febrero de 1891.
- <sup>9344</sup> Unión reaccionaria. Alem y Roque Sáenz Peña, **El Municipio**, viernes 30 de setiembre de 1892; y Radicales y Modernistas. Coalición indispensable, **El Municipio**, martes 4 de octubre de 1892.
- <sup>9345</sup> La decadencia de Roca y el renacimiento (**El Municipio**-14-VIII-1892-p.1-col.1).
- <sup>9346</sup> La futura presidencia (**El Municipio**-18-II-1892)
- <sup>9347</sup> Errores y remedios (**El Municipio**-27-III-1892)
- <sup>9348</sup> Etchepareborda, 1968, 139. Con motivo del estado de sitio declarado el 2 de abril fueron remitidos presos a la corbeta La Argentina Leandro Alem, Víctor Molina, Miguel A. Páez, Coronel Julio Figueroa, Joaquín Castellanos, Martín M. Torino, Rufino Pastor, Guillermo Leguizamón, Francisco Barroetaveña, Oscar Liliedal, Adolfo Saldías y Diego Fernández Spiro (**La Nación**, viernes 8 de abril de 1892; y en Giacobone y Gallo, 1999, 40). Juan Posse es llevado a la cañonera Paraná junto con Marcelo T. de Alvear, Julio Arriaga y Celindo Castro. Unos días después fueron trasladados al pontón Rossetti, donde se encontraban hacinados casi todos los dirigentes radicales, incluso Alem. Semanas más tarde, fueron desembarcados en Montevideo en calidad de desterrados. En Santiago del Estero, con orden del juez fueron aprehendidos Ramón Iramain, Francisco Castañeda Vega y Dupuy "...como cabecillas de la conspiración nacional" (**La Nación**, Buenos Aires, 3-IV-1892).
- <sup>9349</sup> Todos los oficiales del 5º de Infantería —entre ellos el Cap. Amador Molina, Cap. Avelino Martínez, Juan H. Ruiz González, Manuel Manrique, Luis Fortunato, Antonio Tassi, Bernardo Austerlitz y Pedro Ocampo-- estuvieron detenidos en el Campamento de Santa Catalina por haber sido delatados de conspiradores por el Teniente Eduardo Gallino (AGE-Leg.7635, El Diario, viernes 23-IX-1892 y AGE, Leg.8213, reproducido completo en Apéndice E-II). También se encontraban detenidos en la División Palacios el Cap. Exequiel Canicoba, del Regimiento 7º de Caballería, y el Teniente 1º Arturo Urien, del 1er Batallón del Regimiento 5º de Infantería de Línea (AGE-Leg.2526). Asimismo estuvieron detenidos el Teniente Juan Noguera y el Subteniente Calixto Victoriano López del Batallón 4º; Eduardo Conesa del Batallón 10º; los subtenientes Luis Chouciño, Eduardo Méndez y

---

Antonio López, del Batallón 12º; el Teniente 1º Francisco Villarino y el Subteniente Luis Galmarini del 11 de Caballería; los Ingenieros Capitán Juan Madariaga y Teniente Hilario Cuitiño, el Sargento Avellaneda y los hermanos [Ángel y Martín] Hernández del 4º de Infantería; y Jorge Osés, Estanislao Estrada y Saúl Fernapan del 5º (*El Diario*, jueves 22 de setiembre y viernes 23-IX-1892).

Finalmente, al cabo de unos meses, el propio Comandante Nicolás Palacios dio por concluido el sumario, deplorando la prisión sufrida y sobreseyendo a los implicados (*El Diario*, viernes 14 de octubre de 1892). Es de destacar, como habiendo el Cap. Antonio Tassi participado a regañadientes del Consejo de Guerra que ajustició a un soldado revolucionario de filiación Radical en Formosa en las postrimerías de 1891, relatado en otro capítulo de esta obra, supo emanciparse de la disciplina imperante al extremo de conspirar contra las autoridades constituidas. Tassi llegó a ser Teniente Coronel del ejército Peruano.

<sup>9350</sup> ¿Qué es lo que hay? (*La Prensa*, 23-IX-1892, p.4), reproducido completo en el Apéndice F-V. Sobre las deserciones con armas y bagajes del Campamento de Santa Catalina, ver *El Municipio*, martes 20-IX-1892, y miércoles 21 de setiembre de 1892. Ver también, Las Conspiraciones Militares, en *El Municipio*, sábado 24-IX-1892, tomado del diario *La Prensa*. Sobre la deserción calificada del Capitán Camilo Anschutz (21-150-C), ver AGE, Leg.772.

<sup>9351</sup> ¿Qué es lo que hay? (*La Prensa*, 23-IX-1892, p.4), reproducido completo en el Apéndice F-V. Sobre las deserciones con armas y bagajes del Campamento de Santa Catalina, ver *El Municipio*, martes 20-IX-1892, y miércoles 21 de setiembre de 1892. Ver también, Las Conspiraciones Militares, en *El Municipio*, sábado 24-IX-1892, tomado del diario *La Prensa*. Sobre la deserción calificada del Capitán Camilo Anschutz (21-150-C), ver AGE, Leg.772.

<sup>9352</sup> La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (*El Municipio*, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.-

<sup>9353</sup> Etchepareborda, 1968, 149-150. Sobre la revolución en Santiago del Estero en 1892, ver Alén Lascano, 1992, 437-441.

<sup>9354</sup> Sobre Bermejo y el desarme de Corrientes, ver Sommariva, 1929-1931, II, 201-202.

<sup>9355</sup> Sobre Escalante y la protección de Catamarca, ver Sommariva, 1929-1931, II, 203-206.

<sup>9356</sup> Sobre el gabinete Cané, ver Sommariva, 1929-31, II, 207.

<sup>9357</sup> La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (*El Municipio*, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.-

<sup>9358</sup> La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (*El Municipio*, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.-

<sup>9359</sup> La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (*El Municipio*, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.-

<sup>9360</sup> Proceso de la Crisis. La Piedra de Toque, *El Municipio*, 10-VIII-1893, p.1, col.1

<sup>9361</sup> Proceso de la Crisis. La Piedra de Toque, *El Municipio*, 10-VIII-1893, p.1, col.1

<sup>9362</sup> La Presidencia de la Crisis y las crisis de la presidencia (*El Municipio*, miércoles 28-VI-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-VII.-

<sup>9363</sup> Una Lección Mas. Una desaparición misteriosa, *La Prensa*, 7 de julio de 1893, p.4, col.1-3.

<sup>9364</sup> Una Lección Mas. Una desaparición misteriosa, *La Prensa*, 7 de julio

---

de 1893, p.4, col.1-3. La expresión "reaccionario" no tenía en aquel entonces la misma acepción que en la actualidad, significando todo lo contrario, al extremo de utilizársela como sinónimo de revolucionario.

- <sup>9365</sup> Silencio Elocuente, **La Prensa**, 25 de julio de 1893, p.4, col.1-2.
- <sup>9366</sup> Una Lección Mas. Una desaparición misteriosa, **La Prensa**, 7 de julio de 1893, p.4, col.1-3. La expresión "reaccionario" no tenía en aquel entonces la misma acepción que en la actualidad, significando todo lo contrario, al extremo de utilizársela como sinónimo de revolucionario.
- <sup>9367</sup> Renuncia del Presidente. La conferencia de ayer, **La Prensa**, 2 de julio de 1893, p.3, col.5-7.
- <sup>9368</sup> ¿Qué fue la Conferencia?, **La Prensa**, 3 de julio de 1893, p.3, col.3-5.
- <sup>9369</sup> Ideas y no Hombres. La Tenacidad del Mareo, **La Prensa**, 4 de julio de 1893, p.3, col.5-7.
- <sup>9370</sup> Perfiles de la Situación. Sobre la reorganización del Ministerio, **La Prensa**, 6 de julio de 1893, p.4, col.2-4.
- <sup>9371</sup> Revolución Nacional (*El Municipio*, domingo 6-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IX.-
- <sup>9372</sup> Botana, 1977, 169.
- <sup>9373</sup> Por el Derecho y la Moral. El Fantasma de la Guerra Civil, **La Prensa**, 10 de julio de 1893, p.3, col.5-7; El Desarme General. La Ley Pareja se Impone, **La Prensa**, 13 de Julio de 1893, p.3, col.6-7; Los Parques Provinciales. La Ley Inflexible para todos, **La Prensa**, 16-VII-1893, p.4, col.1-2; Milagros del Desarme. Resurgimiento lógico de las Evoluciones, **La Prensa**, 17 de julio de 1893, p.3, col.5-6; y Una Política Neta. Necesidad de que haya vencedores y vencidos, **La Prensa**, 19 de Julio de 1893, p.4, col.1-2. Sobre el Desarme en Buenos Aires, ver P.R., 1913, 24; y Etchepareborda, 1968, 175.
- <sup>9374</sup> Revoluciones e Intervenciones, **La Prensa**, 31 de julio de 1893, p.3, col.2-4.
- <sup>9375</sup> Revelaciones categóricas, Lo que dicen los Parques provinciales, **La Prensa**, 7-VIII-1893, p.3, col.6-7.
- <sup>9376</sup> Revelaciones categóricas, Lo que dicen los Parques provinciales, **La Prensa**, 7-VIII-1893, p.3, col.6-7.
- <sup>9377</sup> El Carácter Nacional, Amagos de una Lucha Franca, **La Prensa**, 29 de julio de 1893, p.3, col.6-7; y Contra las Intervenciones. Aspectos Nuevos de la Reacción Armada, **La Prensa**, 2 de agosto de 1893, p.3, col.5-6.
- <sup>9378</sup> El Carácter Nacional, Amagos de una Lucha Franca, **La Prensa**, 29 de julio de 1893, p.3, col.6-7.
- <sup>9379</sup> El Carácter Nacional, Amagos de una Lucha Franca, **La Prensa**, 29 de julio de 1893, p.3, col.6-7.

- 
- <sup>9380</sup> Revoluciones e Intervenciones, **La Prensa**, 31 de julio de 1893, p.3, col.2-4. Sobre la revolución en San Luis, del 29 de julio de 1893, ver P.R., 1913, 142-146; y Etchepareborda, 1968, 155-159. Sobre la revolución en Santa Fe, del 30 de julio de 1893, ver P.R., 1913, 147-149; y Etchepareborda, 1968, 160-174.
- <sup>9381</sup> Revolución Nacional (**El Municipio**, domingo 6-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IX.-
- <sup>9382</sup> Revolución Nacional (**El Municipio**, domingo 6-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IX.-
- <sup>9383</sup> Revolución Nacional (**El Municipio**, domingo 6-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IX.-
- <sup>9384</sup> Revolución Nacional (**El Municipio**, domingo 6-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-IX.-
- <sup>9385</sup> Revoluciones e Intervenciones, **La Prensa**, 31 de julio de 1893, p.3, col.2-4.
- <sup>9386</sup> Revoluciones e Intervenciones, **La Prensa**, 31 de julio de 1893, p.3, col.2-4.
- <sup>9387</sup> P.R., 1913, 193-197. Otro Escarmiento. La Renuncia del Gobernador Costa, **La Prensa**, 8 de agosto de 1893, p.3, col.6-7; y Otra Vez las Intervenciones. Imperio de la Política Anti-Intervencionista, **La Prensa**, 9-VIII-1893, p.4, col.1-2.
- <sup>9388</sup> Otra Vez las Intervenciones. Imperio de la Política Anti-Intervencionista, **La Prensa**, 9-VIII-1893, p.4, col.1-2.
- <sup>9389</sup> Ver el parte de guerra enviado el 9 de agosto de 1893 por el Coronel Ramón L. Falcón al Presidente del Senado y Gobernador en ejercicio Guillermo Doll, en el Apéndice F-XVIII.
- <sup>9390</sup> Sommariva, 1929-31, II, 218.
- <sup>9391</sup> En la toma de Las Flores, Azul y Olavaria, dirigida personalmente por Hipólito Irigoyen, participaron los mayores Menéndez y Manuel Guerrero, los Capitanes Antonio Madariaga, Argañaraz, y Bullinois, los Tenientes Pérez, Millar y Juan A. Cambiasso; y los subtenientes Marcos Hermelo, Tomás Vallée y Alfredo Romero (Etchepareborda, 1968, 183
- <sup>9392</sup> Etchepareborda, 1968, 172.
- <sup>9393</sup> Piquetes armados de revolucionarios armados patrullaban todos los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, deteniendo a todo militar sospechoso de pertenecer a las fuerzas leales al gobierno. En la estación Irigoyen del Ferrocarril Central Buenos Aires y Rosario, un numeroso grupo armado capitaneado por Rafael Forbes, Agustín Lapuente y otros detuvieron en 1893 un tren y arrestaron al Teniente Coronel E. Zimmerman Saavedra (AGE, Leg.279).
- <sup>9394</sup> Cabanella de Torres, 1961, 223.
- <sup>9395</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.

- 
- <sup>9396</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. 16 Septiembre 1893: Fui dado de baja del Ejército con diez oficiales más y por el mismo Superior Decreto por el art.44 inc.2 y 5º de la Ley 1254.- comprobante de la 2a División, Dirección General del Personal, Libro Archivo M. de Guerra. MG.1893.271 pág 337 y 338 y lista revista de Agosto, Septiembre y Octubre 1893, 1er Escd. 3m18 y Regimiento 7 Caballería.
- <sup>9397</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.
- <sup>9398</sup> P. R., 1913, 201-207; y Etchepareborda, 1968, 199. El Combate de Ringuelet-Parte del Coronel Falcón (***El Municipio***, domingo, 13-VIII-1893, p.1, col.2-3), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XVIII
- <sup>9399</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. El Proceso por los sucesos conspirativos de Santa Catalina fueron sustanciados el 19 de Diciembre de 1992 (Orden General No.1193), que dio de baja a varios oficiales, entre ellos a Edmundo Álvarez (AGE, Leg.8680).
- <sup>9400</sup> Revolución de Buenos Aires, ***El Municipio***, 10-VIII-1893, p.1, col.4.
- <sup>9401</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. El Proceso por los sucesos conspirativos de Santa Catalina fueron sustanciados el 19 de Diciembre de 1992 (Orden General No.1193), que dio de baja a varios oficiales, entre ellos a Edmundo Álvarez (AGE, Leg.8680).
- <sup>9402</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.
- <sup>9403</sup> o en términos Leninistas, los caminos Prusianos (o vías Junker) de desarrollo capitalista.
- <sup>9404</sup> Para la noción de revolución desde arriba, tal cual la formuló Federico Engels para referirse a la política del Canciller de Hierro Otto Bismark, ver Ribeiro, 1998, 137. Y para la revolución desde arriba en Japón, Turquía, Egipto, y Perú, ver Trimberger, 1978. El marxismo usaba la categoría de bismarkismo senil no asentado, para referirse al régimen de Bismark (1848, Alemania), el cual por medio de pactos con los señores feudales y concesiones al movimiento obrero avanzó en la reforma del estado burgués, sin necesidad de una revolución burguesa.
- <sup>9405</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- <sup>9406</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- <sup>9407</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- <sup>9408</sup> Ver también, Etchepareborda, 1968, 190.
- <sup>9409</sup> AGE, Leg.8213.

---

<sup>9410</sup> AGE, Leg.8213.

<sup>9411</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII

<sup>9412</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII

<sup>9413</sup> La Política Criolla y el Motín Militar (*La Vanguardia*, año XII, número suelto, 11 de febrero de 1905), reproducido íntegro en el Apéndice G-II. Sobre la posición de Lallemant en 1890 y la crítica de Juan Pablo Oliver y Olegario Becerra acerca de la naturaleza burguesa de la revolución del 90, ver Becerra, 1957, 53. Sobre el anti-militarismo y el pacifismo socialista, ver Pons y Seminara, 2004, 95. Sobre el lassalleísmo de Lenin, ver Wright, 2003.

<sup>9414</sup> Nuestra Actitud para alguien (*La Protesta*, año IX, no.523, Domingo 14 de mayo de 1905), reproducido íntegro en el Apéndice C-XI.

<sup>9415</sup> ver las ironías de Correa Luna, 1905.

<sup>9416</sup> La Contra-Reacción en Campaña. Acuerdos, Confusiones, Conjuraciones y Extravíos, *La Prensa*, 11 de agosto de 1893, p.4, col.1-2.

<sup>9417</sup> Alonso (2000) equivoca los nombres del Gobernador de Buenos Aires, que era Julio A. Costa y no Eduardo Costa, y de quien estaba al mando de las tropas rebeldes, que era el General Manuel J. Campos y no su hermano el Coronel Julio Campos, pues este último había fallecido en las trincheras del Parque (Alonso, 2000, 173 y 174)..

<sup>9418</sup> Alonso (2000) le atribuye por el contrario el mando militar a Juan Carlos Belgrano (Alonso, 2000, 173).

<sup>9419</sup> Síntomas Graves-Diagnóstico, por Grapho (*El Municipio*, sábado 12-VIII-1893, p.1, col. 1-2, reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XI.-

<sup>9420</sup> La caída del Gral Roca (*El Municipio*, 8-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-X.-

<sup>9421</sup> La caída del Gral Roca (*El Municipio*, 8-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-X.-

<sup>9422</sup> La caída del Gral Roca (*El Municipio*, 8-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-X.-

<sup>9423</sup> La caída del Gral Roca (*El Municipio*, 8-VIII-1893, p.1, col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-X.-

<sup>9424</sup> Etchepareborda, 1968, 200.

<sup>9425</sup> Revoluciones e Intervenciones, *La Prensa*, 19 de agosto de 1893, p.3 col.6-7.

<sup>9426</sup> Revoluciones e Intervenciones, *La Prensa*, 19 de agosto de 1893, p.3 col.6-7.

<sup>9427</sup> Sin Presidente y sin Gabinete. La Lucha y la crisis provocadas por el viejo Régimen, *La Prensa*, 12 de agosto de 1893, p.4, col.1-2.

<sup>9428</sup> Etchepareborda, 1968, 200-201.

- 
- <sup>9429</sup> ¿Qué y Quiénes Gobiernan?, **La Prensa**, 20 de agosto de 1893, p.3, col.7.
- <sup>9430</sup> La Cuestión del día. Los gobiernos derrocados. El poder político de las revoluciones. Sus efectos y las intervenciones nacionales, **La Prensa**, 27 de agosto de 1893, p.4, col.1-2.
- <sup>9431</sup> La Cuestión del día. Los gobiernos derrocados. El poder político de las revoluciones. Sus efectos y las intervenciones nacionales, **La Prensa**, 27 de agosto de 1893, p.4, col.1-2.
- <sup>9432</sup> Contra las Intervenciones, **La Prensa**, 2 de agosto de 1893, p.3, col.5-6. Sobre la caída de Aristóbulo Del Valle, ver Etchepareborda, 1968, 203-205.
- <sup>9433</sup> Paso a la Reacción. Sin Mezclas y sin Confusiones, **La Prensa**, 3 de agosto de 1893, p.3, col.6-7.
- <sup>9434</sup> Etchepareborda, 1968, 206, nota 26. Sobre los alcances del estado de sitio, ver **La Prensa**, 29 de agosto de 1893, p.4, col. 1-2.
- <sup>9435</sup> Teorías sobre intervención (**El Municipio**, martes 15-VIII-1893, p.1, col.7), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XII.-
- <sup>9436</sup> Intervención de Buenos Aires, **La Prensa**, 16-VIII-1893, p.3, col.6-7; y P. R., 1913, 225-230.
- <sup>9437</sup> Alberto Serantes, Alfredo Madero, Luis María Doyhenard, Casimiro Villamayor y muchos otros. Como se han desarmado los radicales de La Plata (**El Municipio**, jueves 17 de agosto de 1893), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XII. Doyhenard fue luego Jefe de Policía, durante la gestión de Marcelino Ugarte (Etchepareborda, 1968, 252). Acerca del asesinato de Carlos J. Costa, hermano del gobernador Julio A. Costa, ver los capítulos titulados Tablas de Sangre, en Costa, 1930. Es muy probable que el asesinato de Costa haya sido una venganza por lo acontecido en el andén de la estación de La Plata en septiembre de 1893, pero de manera alguna cabría sospechar que Yrigoyen lo mandó matar para eliminar un caudillo electoralmente imbatible en el oeste de la provincia, como lo asevera Costa, 1930. Cabe agregar que el ex gobernador Julio A. Costa, en su libro Romance de un Cadete, publicado en octubre de 1930, aplaudió el golpe de estado del 6 de septiembre.
- <sup>9438</sup> Como se han desarmado los radicales de La Plata (**El Municipio**, jueves 17 de agosto de 1893), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XII. Sobre los hechos sangrientos del Gral. Bosch en La Plata luego del desarme y en agresión al Cnel. Martín Yrigoyen, ver Roetger, 1913, 225-233.
- <sup>9439</sup> Como se han desarmado los radicales de La Plata (**El Municipio**, jueves 17 de agosto de 1893), reproducido en forma íntegra en el Apéndice F-XIII.
- <sup>9440</sup> Desagravio y Hostilidad, **El Municipio**, 17-VIII-1893, p.1, col.8; y Renuncia de Eduardo Olivera Interventor de Buenos Aires, **El Municipio**, 25-VIII-1893, p.1, col.8; y 12-IX-1893, p.1, col.8. Sobre destitución de Olivera, sucedido por Lucio López, **El Municipio**, 20-IX-1893, p.1, col.7; y p.4, col.7.
- <sup>9441</sup> Sobre la revolución de Corrientes en agosto de 1893, ver Etchepareborda, 1968, 203-210. Sobre la revolución de Tucumán, del 7 de septiembre de 1893, ver Etchepareborda, 1968, 211-215. Sobre la revolución de Santa Fe, del 24 de septiembre de 1893, ver

---

Etchepareborda, 1968, 216-229. Sobre las cartas escritas por Alem desde la cárcel de Rosario, ver Etchepareborda, 1968, 236-240.

<sup>9442</sup> Etchepareborda, 1968, 236-240.

<sup>9443</sup> Galán, 1894, 29, 36 y 37.

<sup>9444</sup> Sobre la estrategia política de las "paralelas" y el Bernardismo, ver Giacobone y Gallo, 1999, 109-148.

<sup>9445</sup> ver Melo, 1966. Para esa época, el clima antisemita generado por el affaire Dreyfus penetró en los ámbitos próximos al Mitrismo, la facción opositora oficial al PAN (McGee Deutsch, 1986, 45-47; citado en Andreassi Cieri, 1996, 41, nota 44). Sobre el anticlericalismo judío y la emergencia del moderno antisemitismo francés, ver Millman, 1992.

<sup>9446</sup> Romero Carranza, et. al., 1992, III, p.273.

<sup>9447</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9448</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9449</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9450</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9451</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9452</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9453</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9454</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9455</sup> El Ejército Nacional (***El Municipio***, 13-XI-1895).

<sup>9456</sup> El Ejército Nacional (***El Municipio***, 13-XI-1895).

<sup>9457</sup> El Ejército Nacional (***El Municipio***, 13-XI-1895).

<sup>9458</sup> El Ejército Nacional (***El Municipio***, 13-XI-1895).

<sup>9459</sup> El Ejército Nacional (***El Municipio***, 13-XI-1895).

<sup>9460</sup> Camino de la Dictadura (***El Municipio***, 20-X-1895).

<sup>9461</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896. Tengo la firme sospecha que el autor de este documento es el propio Leandro Alem, con lo cual sería algo así como su verdadero testamento político.

<sup>9462</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896

<sup>9463</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896

<sup>9464</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896

<sup>9465</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896. Sobre la externalización del enemigo, ver Sánchez-Parga, 2005, 157.

<sup>9466</sup> "El Camino de la Dictadura", El Tiempo (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896

- 
- 9467 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9468 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9469 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9470 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9471 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9472 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9473 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9474 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9475 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9476 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9477 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9478 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896
- 9479 “El Camino de la Dictadura”, *El Tiempo* (Buenos Aires), martes 7 de abril de 1896. Una interpretación hamletiana del suicidio de Alem, la atribuiría a los frustrados deseos de venganza por la ejecución de su padre mazorquero a manos de la oligarquía porteña (Schmitt, 1993, 19-26).
- 9480 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9481 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9482 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9483 *El Tiempo*, 2-II-1897. Acerca de los distintos riesgos de una conjura tratada en los Discursos sobre Tito Livio de Maquiavelo, ver Strauss, 1964, 201-202; Sánchez-Parga, 2005, 135; y Altini, 2005, 83-88. Sobre la conjura en las obras de Salustio y de Tito Livio, ver González, 2004, 18 y 372. Sería justamente en estos años, cuando Hipólito Yrigoyen incorporaba a su discurso político pensamientos oriundos del credo Krausista (ver Roig, 1969)
- 9484 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9485 Sánchez-Parga, 2005, 146.
- 9486 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9487 *El Tiempo*, 2-II-1897.
- 9488 Rouquié, 1981, I, 134.
- 9489 Sobre el silencio y el secreto en la conjura, ver Sánchez-Parga, 2005, 145; y Altini, 2005, 87. Sobre el reclutamiento como reacción positiva a una forma de estímulo mimético en la conjura clásica (ejecución de Julio César en Plutarco y atentado contra Cicerón en

---

Salustio), ver Girard, 1995, 239; y González, 2004, 18). Y sobre la conjura homicida como fuente originaria de nuevas instituciones políticas en el teatro isabelino (Shakespeare), ver Girard, 1995, 256-266.

<sup>9490</sup> Ipola, 1989, 120; y Rozitchner, 1985, 115.

<sup>9491</sup> Sobre la relación entre revolución política y revolución social, ver Caffentzis, 2002, 226; y sobre la intervención exterior del partido para producir la conciencia revolucionaria, ver Wright, 2003.

<sup>9492</sup> Tomás Vallée era nacido en Carmen de Areco el 1 de enero de 1871, hijo del empresario de mensajerías Jorge Vallée y de María Cavagnac. En 1893 pasó en comisión a Corrientes a las ordenes del General Napoleón Uriburu y luego fue Diputado Nacional por Buenos Aires. Viajó a Europa conjuntamente con los Mayores Luis Vicat (16-36-A) y Mateo Ruiz Díaz (14-3-A) como miembros de la Comisión de Armamentos en 1898, fue promovido a Teniente Coronel en 1904, a Coronel en 1909, y a General de Brigada en 1913 (Cutolo, 1968-85, VII, 479. Cutolo lo da nacido en Carmen de Patagones pero lo fue en Carmen de Areco, donde su padre tenía la cabecera de mensajerías, según comunicación personal de su hijo).

<sup>9493</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.7, reproducida en Bottinelli, 1921, 21-32. Llama la atención que este epistolario periodístico, divulgado pero no reproducido por Etchepareborda (1968), no haya sido consultado ni por Potash (1971) ni por Rouquié (1981).

<sup>9494</sup> Sobre el capítulo 6° del Libro III de los Discursos sobre Tito Livio de Maquiavelo, citados en Altini, 2005, 83, ver Sánchez-Parga, 2005, 147. Es muy probable que el propio Roca recordara estos párrafos de los Discursos de Maquiavelo, pues había sido formado por el ilustrado Amadeo Jacques en el Colegio de Concepción del Uruguay.

<sup>9495</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.7. Ibarguren relata que el Dr. Fernando Saguier había sido comisionado por Yrigoyen para comprometer a su entonces amigo el Mayor José Félix Uriburu, Comandante del 8° Regimiento de Caballería, pero con resultados negativos (Ibarguren, 1969, 188, citado en Rouquié, 1981, I, 134; y Picciuolo, 2000, 101, nota 2). Para esa época, Uriburu había iniciado sus contactos con los profesores alemanes de la Escuela Superior de Guerra. También Etchepareborda relata que el Dr. Saguier contó en un reportaje publicado por la revista **Hoy**, del 1 de febrero de 1935 (que me ha sido imposible hallar), que en 1904 fue comisionado por Yrigoyen a Córdoba para entrevistarse con el Coronel Daniel Fernández, y que le fue necesario repetir la visita para lograr empeñar la palabra de dicho oficial, quien fue gravemente herido en el evento revolucionario (Etchepareborda, 1968, 249-250).

<sup>9496</sup> En esa oportunidad, Marcelo T. de Alvear estaba ausente en París, por lo cual no participó de dicha revuelta.

<sup>9497</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.7.

<sup>9498</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.

- 
- <sup>9499</sup> Sánchez-Parga, 2005, 145.
- <sup>9500</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9501</sup> Sánchez-Parga, 2005, 145.
- <sup>9502</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9503</sup> Los otros padrinos fueron Carlos F. Gómez, Carlos Rodríguez Larreta y Marcelo T. de Alvear. Los facultativos presentes que atendieron a ambos de sus heridas fueron los Dres Uballe y Castro (Rodríguez Yrigoyen, 1934, 87).
- <sup>9504</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9505</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9506</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9507</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9508</sup> debo la identidad de estos oficiales a la comunicación personal de Tomás Vallée (h).
- <sup>9509</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9.
- <sup>9510</sup> Comunicación personal de su hijo Tomás Vallée, quien dedujo los nombres de los borradores de la carta de su padre, que se hallan en su poder.
- <sup>9511</sup> Rouquié, 1981, I, 136.
- <sup>9512</sup> Rock, 1992, 60.
- <sup>9513</sup> Rock, 1992, 60.
- <sup>9514</sup> Rouquié, 1981, 137.
- <sup>9515</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9. La saga periodística en **La Nación** continúa los días 13, 14, 19 y 21 de enero de 1921 (**La Nación**, 13-I-1921, p.5, col.4; 14-I-1921, p.5, col.2; 19-I-1921, p.5, col.3-4; 19-I-1921, p.6, col.5; y 21-I-1921, p.7, col.2), citados en Etchepareborda, 1968, 251, nota 10.
- <sup>9516</sup> Cutolo, 1968-85, VII, 479. El Mayor Vallée era reacio a los trabajos de oficina, pero tuvo que aceptar el convite de su amigo el General Luis María Campos, al cual no se podía negar (Comunicación personal de Tomás Vallée [h]).
- <sup>9517</sup> Ver Bottinelli, 1921. El General Vallée explica el porqué de su retiro, **La Nación**, 11-I-1921, p.9; y **La Fronda**, 12-I-1921. La saga periodística en **La Nación** continúa los días 13, 14, 19 y 21 de enero

---

de 1921 (*La Nación*, 13-I-1921, p.5, col.4; 14-I-1921, p.5, col.2; 19-I-1921, p.5, col.3-4; 19-I-1921, p.6, col.5; y 21-I-1921, p.7, col.2), citados en Etchepareborda, 1968, 251, nota 10.

<sup>9518</sup> Bottinelli, 1921, 41-45. Sobre el incidente entre el Ministro de Guerra y el Gral. Vallée, ver *La Frontera*, sábado 22-I-1921. Cabe aclarar que cuando el Gral. Vallée recibió en Mar del Plata el telegrama de los padrinos del Ministro Moreno, viajó inmediatamente a Buenos Aires. Una vez en la Capital le solicitó infructuosamente a su amigo el General José F. Uriburu ser su padrino. No encontrando quien le aceptara su pedido, finalmente logró que el Gral. Eduardo Broquen y Emilio Giménez Zapiola aceptaran la gestión (comunicación personal del Sr. Tomás Vallée [h]).

<sup>9519</sup> Ver El Servicio Obligatorio en *La Prensa*, 25-IV-1900, p.3, columna 7, reproducido íntegro en el Apéndice F-X; y Organización Militar, en *La Prensa*, 30-IV-1900, p.3, columna 2 y 3. Ver también Rouquié, 1986, I, 83; Ramírez, 1987, 353-360; y Ocampo, 2003, 261.

<sup>9520</sup> Sobre el general Louis Trochu, héroe de Solferino (1859) y comandante de las tropas del Emperador Napoleón III, ver Possony, 1968, 110 y 112.

<sup>9521</sup> Capdevila, A.; P. Ricchieri; y Juan Balestra (1901, 1997): "Debate sobre servicio militar obligatorio", en Botana y Gallo, 1997. Derrotado Capdevila en la Cámara de Diputados en dos debates centrales a su pensamiento, reducido a la impotencia y presintiendo el surgimiento futuro del militarismo golpista, se suicidó en marzo de 1905 (*La Prensa*, 16-III-1905, p.7, columnas 6 y 7. En medio de la profunda conmoción que produjo este hecho trágico despidieron sus restos el Ministro de Guerra Gral. Enrique Godoy, Roque Sáenz Peña, Manuel Carlés, y el Teniente Coronel Tomás Vallée, quien leyó un emotivo discurso apologético). Sobre la rapidez, el secreto y la sorpresa en las campañas militares y el Coronel Henderson, ver Paret, 1968, 53; y Luvaas, 1968, 114.

<sup>9522</sup> Rodríguez Molas, 1983, 85.

<sup>9523</sup> Sobre la revolución de 1905 en Santa Fe, ver Etchepareborda, 1968, 270.

<sup>9524</sup> Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Juan A. Covaro al Señor Secretario (AGE-Leg.11.944), reproducido completo en Apéndice I-IV).- Zaballos supuestamente debía encontrarse en Buenos Aires para ser juzgado en Consejo de Guerra.

<sup>9525</sup> Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Juan A. Covaro al Señor Secretario (AGE-Leg.11.944), reproducido completo en Apéndice I-IV).-

<sup>9526</sup> Caballero, 1961, 96-100.

<sup>9527</sup> Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Juan A. Covaro al Señor Secretario (AGE-Leg.11.944), reproducido completo en Apéndice I-IV).-

<sup>9528</sup> Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Juan A. Covaro al Señor Secretario (AGE-Leg.11.944), reproducido completo en Apéndice I-IV).

<sup>9529</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).

- 
- <sup>9530</sup> Sobre la teoría del motín y las sediciones en Bolivia, ver Canelas López, 1983. Para una mirada histórica al problema de las conspiraciones en Bolivia, ver Medinaceli y Soux, 2002. Sobre rebeliones, motines y movimientos de masas en el siglo XVIII venezolano (1730-1781), ver Felice Cardot, 1961.
- <sup>9531</sup> Sobre el Motín de Buenos Aires del primero de enero de 1809 y el rol de Alzaga, Liniers y Elío, ver Ramos, 1964. Sobre el motín de Arequito, ver García, 1989, 105-109.
- <sup>9532</sup> Los sucesos de Corrientes, **Sud América**, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido íntegro en el Apéndice E-XI; y Herrera, 1930, 55.
- <sup>9533</sup> Mantilla, 1972, 325.
- <sup>9534</sup> Allende, 1964, 399. Ver **El Diario**, del 18 de agosto al 2 de setiembre de 1893.
- <sup>9535</sup> Gondra, 1945, 57; y Etchepareborda, 1968, 257-258.
- <sup>9536</sup> Etchepareborda, 1968, 263-269.
- <sup>9537</sup> La tragedia de Pirovano, **El Municipio** (Rosario), n.5161, 16-II-1905, p.2, col.1.
- <sup>9538</sup> Navarro, 1906, 10.
- <sup>9539</sup> AGE, Leg.13.797; y La tragedia de Pirovano, **El Municipio** (Rosario), n.5161, 16-II-1905, p.2, col.1.
- <sup>9540</sup> Navarro, 1906, 13; y Gondra, 1945, 60. AGE, Legajos 5317 y 5869.
- <sup>9541</sup> Navarro, 1906, 33-40.
- <sup>9542</sup> Miller, 2005, 179.
- <sup>9543</sup> Gondra, 1945, 60; y Etchepareborda, 1968, 259. Alejandro Moreno era hermano de Julio Moreno, quien luego fue Ministro de Guerra en la primera presidencia de H. Yrigoyen. A sus exequias concurrió el Mayor Tomás Vallée.
- <sup>9544</sup> Navarro, 1906, 21.
- <sup>9545</sup> Gondra, 1945, 64.
- <sup>9546</sup> Gondra, 1945, 64.
- <sup>9547</sup> Gondra, 1945, 64.
- <sup>9548</sup> Etchepareborda, 1968, 257.
- <sup>9549</sup> Lacoste, 1990, I, 25.
- <sup>9550</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9551</sup> Mauricio N. Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI). Sobre el testimonio del Teniente Coronel Arnulfo Ferreira de la Cruz, ver AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice N-V. Ignoro que parentesco existía entre el Mayor Mauricio Solá

---

y el General Ricardo Solá, Presidente del Consejo de Guerra durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen.

- <sup>9552</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9553</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9554</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9555</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9556</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9557</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9558</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9559</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9560</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9561</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9562</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9563</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9564</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9565</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9566</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-X). *Caras y Caretas* del 18 de febrero de 1905 retrata el interior del comedor de oficiales que fue invadido por la Infantería en el último asalto llevado por el Comandante Daniel Fernández, y que fue rechazado por el fuego cruzado de la artillería.
- <sup>9567</sup> Ruiz Moreno, 1966, 8.
- <sup>9568</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9569</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).

- 
- <sup>9570</sup> Ing. Civil Justiniano Torres al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 22/1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VII).
- <sup>9571</sup> Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg. 12.487, reproducido completo en Apéndice N-VI).
- <sup>9572</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9573</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9574</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9575</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9576</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9577</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9578</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9579</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9580</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9581</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg. 7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9582</sup> Sobre los capellanes castrenses Marcos Donati, Moisés Alvarez y Fortunato Marchi en la Conquista del Desierto, ver Phordoy, 1980, 179-201. Para los capellanes militares en los territorios argentinos, ver Ramayón, 1946.
- <sup>9583</sup> Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte pasado por el ex Jefe de la 5ª Región Gral Ignacio Fotheringham relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (Buenos Aires, junio 17 de 1910). AGE-Leg. 12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice I-III.
- <sup>9584</sup> Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte pasado por el ex Jefe de la 5ª Región Gral Ignacio Fotheringham relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de

---

febrero de 1905 en Mendoza (Buenos Aires, junio 17 de 1910). AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice I-III.

- 9585 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.
- 9586 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.
- 9587 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.
- 9588 Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I. Goulú estuvo luego, en la revolución de 1905 entre las filas de la represión (Etchepareborda, 1968, 286).
- 9589 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- 9590 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- 9591 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- 9592 Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice F-XVII
- 9593 Etchepareborda, 1968, 282. Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII). ***Caras y Caretas*** del 18 de febrero de 1905 reproduce el frente de la guardia del regimiento 1º de Artillería donde mataron el caballo que montaba el Teniente Coronel Gregorio Vélez al retomar el mando del cuartel.
- 9594 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII).
- 9595 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII).
- 9596 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII).
- 9597 Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice N-VIII).
- 9598 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- 9599 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).

- 
- <sup>9600</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9601</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9602</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9603</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9604</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9605</sup> AGE, Leg.7496.
- <sup>9606</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9607</sup> Lacoste, 1990.
- <sup>9608</sup> “I.- Fuerzas Sublevadas. II.- Hora de Sublevación. III.- Ataques: 1-Depósito de Armas. 2-Casa de Gobierno y Policía.3-Penitenciaria.4-Cuartel del 2 de Cazadores. IV.- Prisión de Jefes y Oficiales. V.- Comportamiento de Jefes y Oficiales en el fuego. VI.- Marcha de los Sublevados para resistir al Cnel. Tiscornia. VII.- Avance del Cnel. Tiscornia y fuerzas de San Juan. VIII.- Combate del Coronel Tiscornia, situación de fuerzas, etc. IX.- Reflexiones sobre marchas y combates del Cnel. Tiscornia. X.- Marcha del Jefe de la Región y fuerzas a sus órdenes. XI.- Reflexión sobre Ferro Carriles, descarga de piezas, clase de tropa, etc. XII.- Heridos y muertos. XIII.- Fugados y presos. XIV.- Sanidad y Capellanía. XV.- Observaciones Generales sobre los sucesos ocurridos, procederes de varias reparticiones, opinión popular, etc” (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 --AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido en Apéndice I-II).
- <sup>9609</sup> Fuerzas sublevadas del Batallón 2 de Cazadores: Oficiales: Teniente 2º Luis Cobarrubias [21-82-I], Subtenientes Rufino Gazari [27-52-I], Aquiles Solaune y Enrique Lalucat. Preboste Jose D’Andrea y Ayudante de Preboste Virgilio Avellaneda. Tropa: Un Sargento, un Cabo Primero, cuatro cabos 2os, un trompa, dos tambores, y un músico, setenta soldados. 1º. de Montaña. Oficiales: Teniente 2º Fausto Alfonso [24-37-A] y Alférez José Alvea y Marcos Levalle [27-10-A]. Ayudante de Preboste Félix Bravo y los ex oficiales Teniente Eleodoro Cros y Alférez Emilio Quellet. Tropa: Tres Sargentos, dos Cabos 1os, cuatro Cabos 2os, un corneta y dos músicos, y cincuenta y cinco soldados. 1º de Caballería. Oficiales: Cap. Luis F. Pérez Colman, Teniente 1º. Héctor V. Varela [21-154-C], Teniente 2º Alfredo Correa [23-13-C], Alférez Alberto Martínez, Alférez Juan D. Núñez, Farmacéutico Jose C. López. Tropa: Tres Sargentos, dos Cabos 1os, siete Cabos 2os, siete cornetas, cincuenta y seis soldados, y cinco penados. Agréguese a esto el Preboste del 4 de Infantería Miguel Aparicio y del 2 de Artillería de Montaña los oficiales Capitán Eusebio Ibáñez, Tte 1º Rodolfo Martínez González [21-118-A], y Arturo Orfila [21-119-A], el Tte 1º Víctor Tassara [21-73-I] y el Ayudante de Preboste Carlos E. Gómez. Tropa: 2 Cabos y 15 soldados (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905--AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido en Apéndice I-II).

- 
- <sup>9610</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9611</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9612</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9613</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9614</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9615</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9616</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9617</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9618</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9619</sup> Lacoste, 1990, I, 29.
- <sup>9620</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9621</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9622</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9623</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9624</sup> Ibáñez contaba con un gran predicamento militar, por cuanto quince años antes en calidad de Alférez había sido herido en la Revolución del 90 (Mendía, 1890, II, 49).
- <sup>9625</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9626</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9627</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9628</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).

- 
- <sup>9629</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9630</sup> Muertos y Heridos: 1 de Caballería: Tres soldados heridos y un penado herido. 1 de Montaña: Dos soldados muertos y cuatro heridos. 2 de Cazadores: Un sargento herido, tres soldados muertos y siete heridos. De las fuerzas de San Juan según parte del Coronel Tiscornia: un muerto y cuatro heridos. Los sublevados según Informes tomados han tenido como quince muertos y treinta o más heridos. Tenemos que lamentar la muerte del digno Comandante Don Aquiles Zuloaga y mal herido el Capitán Pertiné. Teniente 1 Don Jose Villarroel y el Teniente (“revolucionario”) del 2 de Montaña Martínez González. Levemente el Sub Teniente Roque Núñez y levemente el Mayor Don José Rodríguez (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905--AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9631</sup> 2 de Cazadores: Sub Teniente Enrique Lalucat. Preboste Don José D’Andrea y Ayudante de Preboste Virgilio Avellaneda. 1 de Caballería: Alférez Juan de Dios Nuñez (sentenciado). 2 de Montaña: Teniente 1º Rodolfo Martínez González (sentenciado).  
En Chile: 2 de Cazadores: Teniente Don Luis B. Cobarrubias-1 de Montaña: Teniente 2 Fausto Alfonso. Alférez José Albra, Ayudante de Preboste Félix Bravo y los Ex Oficiales Teniente 1º Eleodoro Cross [19-18-A] Emilio Quellet [25-6-A]. 1 de Caballería: Capitán Don Luis F. Pérez Colman. Teniente 1º Héctor B. Varela (se supone). 2 de Montaña: Capitán Eusebio Ibáñez.  
Fugados (cuyo paradero se ignora). 2 de Cazadores: Subteniente Rufino Gazari. Subteniente Aquiles Sulama. 1 de Montaña: Alférez Marcos Levalle. 1 de Caballería: Teniente 2º Alfredo Correa. Alférez Alberto Martínez. 2 de Montaña: Teniente 1º Don Arturo Orfila, Ayudante de Preboste Carlos T. Torres. 4 de Infantería: Teniente 1º Víctor Tassara.
- <sup>9632</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9633</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9634</sup> También se hicieron acreedores a los mayores elogios del General Fotheringham, “...tributados con verdadera satisfacción, estas dos reparticiones (Sanidad y Capellanía). El Coronel Tiscornia reconociendo muy especialmente la Sanidad Militar que le acompañó en su marcha y en los combates. El digno Capellán Guillermo Kubler, les hizo notar en los combates por su heroica asistencia y después por su caritativa asistencia, llenando noblemente su misión (Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice I-II).
- <sup>9635</sup> Caballero, 1961, 106.
- <sup>9636</sup> Caballero, 1961, 107; y Etchepareborda, 1968, 276. Ambos autores difieren en cuanto a la conducta del Capitán Pedro N. Zeballos.
- <sup>9637</sup> Caballero, 1961, 111.
- <sup>9638</sup> Sobre la autonomía del poder militar en un orden burocrático-pretoriano, ver Mann, 1997, II, capítulo 12.
- <sup>9639</sup> Para el modelo corporatista en la tradición ibérico-latina, ver Wiarda, 1973.
- <sup>9640</sup> Para el cesarismo del gomecismo en Venezuela, ver Vallenilla Lanz, 1990, Ziems, 1979, y Segnini, 1986. Para el pretorianismo oligárquico y la estrategia contra-insurgente de Porfirio Díaz, ver Vanderwood, 1976, Gutiérrez Santos, 1955, y Hernández Chávez, 1989.

---

<sup>9641</sup> El Ejército-consecuencias del mal gobierno (*El Municipio*-23-IX-1892-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-X.-

<sup>9642</sup> El Ejército-consecuencias del mal gobierno (*El Municipio*-23-IX-1892-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-X.-

<sup>9643</sup> Ramírez, 1987, 118. Sobre pretorianismo, ver Kohen, 1983, 83.

<sup>9644</sup> Para la evolución histórica de las técnicas del transporte y su productividad, ver Claval, 1999, 213.

<sup>9645</sup> Hawking, 1988, 22, citado en Lasky Markovich, 2002, 173.

<sup>9646</sup> El Ejército (*El Municipio*-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V.

<sup>9647</sup> El Ejército (*El Municipio*-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V.

<sup>9648</sup> La reorganización del ejército (*El Municipio*-10-IX-1891-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-VII.

<sup>9649</sup> La reorganización del ejército (*El Municipio*-10-IX-1891-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-VI.

<sup>9650</sup> El Ejército (*El Municipio*-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V.

<sup>9651</sup> El Ejército (*El Municipio*-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V.

<sup>9652</sup> El Ejército (*El Municipio*-22-I-1891-p.1-col-1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-V.

<sup>9653</sup> En ese entonces circulaba el texto de Bringas y Martínez (1884), sobre la aplicación de la telegrafía a los servicios militares, y el de Bornecque (1878) sobre el rol de las locomotoras desde el punto de vista militar. En junio de 1875, durante la presidencia de Sarmiento, el Ministro de Guerra y Marina Coronel Adolfo Alsina le manifestó al Director del Colegio Militar Coronel Mariano Moreno, que "...el Gobierno quiere que en el Colegio Militar se enseñe la telegrafía eléctrica, como se enseña las matemáticas o cualquier otro ramo del saber humano, de aplicación inmediata al arte de la milicia" (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1876, 297-300)

<sup>9654</sup> Cuccorese, 1984, 89, y 133; Scalabrini Ortiz, 1957, 209; y Ramírez, 1987, 155.

<sup>9655</sup> En 1887, el Teniente Coronel Higinio Vallejos fue comisionado a Inglaterra para adquirir material telegráfico. Vallejos le escribe al Ministro de Guerra Manuel R. García informándole que se trasladó a la casa de los Sres Clark y Muirhead, a fin de examinar los materiales pedidos por el gobierno, pero que en la misma no había mas que aisladores [iguales a los que habían dado malos resultados], alambre de atar No.16 y los elementos de pila. Que luego se trasladó a Birmingham y Manchester, donde comprobó los postes dando un regular resultado, y el alambre en Manchester muy poco satisfactorio. Con respecto a los aisladores, Vallejos le manifiesta a García que es más conveniente que sean de una pieza, y el alambre No.7 que no baje de 20 vueltas e igual número de tensión. (AGE, Leg.3346).

<sup>9656</sup> En la sesión de la Cámara del 5 de abril de 1895 se discutirá el proyecto de reforma de los actuales regimientos de artillería en unidades tácticas menores, o sea grupos de tres baterías, presentado por el General Francisco Reynolds (*El Tiempo*, 5 de abril de 1895). Pero el redactor de *El Tiempo* tenía la creencia opuesta, de que el proyecto de desplegar fuerzas de artillería en abanico a lo largo de toda la

---

frontera es "...por una parte inoportuno; y por otra parte, impracticable en algunos puntos. Es impracticable, si tenemos en cuenta que, dado el estado de nuestra organización en general, las líneas militares actuales no están suficientemente cubiertas en su enorme extensión, es decir, que con once mil hombres que se pagan por el presupuesto, no hay fuerzas suficientes para dicho servicio. La distribución de las fuerzas tampoco es ventajosa, pues las baterías de artillería que se asignan a cada línea, representan una pura pérdida siendo más que sabido que ninguno debe estar mas concentrado que la artillería, porque el material y sus accesorios, no pueden conservarse sin buenos reparos; y porque, la instrucción teórico-práctica no puede darse suficientemente en ella, sino en el cuartel del regimiento respectivo, en los polígonos y en los campos de maniobra. ¿Y que servicio de importancia se puede exigir de la artillería en una situación pasiva como es en la cual deben hallarse en los desiertos y montañas? Según el nuevo proyecto, se designa un número de cuerpos para cada línea militar, lo que haría desaparecer los núcleos de fuerzas que, para fines de instrucción, y de orden público, guarnecen las ciudades importantes....Nosotros por ahora no debemos distribuir nuestro pequeño ejército de línea en forma de gran abanico sino, reconcentrarlo sobre varios puntos que se hallan a pocas jornadas de donde deben recibir las ordenes para reconcentrarse; donde puedan ir completando su organización, su instrucción, y fortificando su moral y disciplina. Adviértase que tiempo emplean para estar en Bahía Blanca o en esta capital, las tropas de la guarnición que se asigna a la línea militar de Río Gallegos, las del Limay, las de los Andes, las del Bermejo; recuérdase que los caminos y los elementos de transporte no son adecuados para que tropas numerosas de las tres armas hagan grandes jornadas en corto tiempo; téngase en cuenta que las líneas telegráficas suelen estar interrumpidas hasta quince días en las actuales líneas militares y se comprenderá lo expuesto (*El Tiempo*, 4-IV-1895)

<sup>9657</sup> El tendido de la línea "...será hecho por nosotros; postes, colocación de alambres, aisladores, tensores y la construcción de una habitación en cada uno de los puntos en que debe existir una Ofician eseputando Orán, en donde por un pequeño alquiler de dos pesos fuertes mensuales podría conseguirse. El Exmo. Gobierno tendría que proporcionar el alambre necesario para ochenta leguas, aisladores, tensores y los aparatos para ocho estaciones que serían: Orán, Cenizas, Lavalle, Capitán Sarmiento, Aguirre, Rivadavia, Gorriti y Quemes. También pondría a nuestro alcance todos los elementos que no nos es posible proporcionarnos por nuestros propios esfuerzos: un telegrafista de 1ª clase para que permaneciendo en la Comandancia enseñara este arte sucesivamente a todos los oficiales que sirven en la frontera; pues con un experimento que ya he hecho conozco que en muy poco tiempo, ellos solos servirían perfectamente la Oficina de cada uno de los fuertes. (Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.-

<sup>9658</sup> El tendido de la línea "...será hecho por nosotros; postes, colocación de alambres, aisladores, tensores y la construcción de una habitación en cada uno de los puntos en que debe existir una Ofician eseputando Orán, en donde por un pequeño alquiler de dos pesos fuertes mensuales podría conseguirse. El Exmo. Gobierno tendría que proporcionar el alambre necesario para ochenta leguas, aisladores, tensores y los aparatos para ocho estaciones que serían: Orán, Cenizas, Lavalle, Capitán Sarmiento, Aguirre, Rivadavia, Gorriti y Quemes. También pondría a nuestro alcance todos los elementos que no nos es posible proporcionarnos por nuestros propios esfuerzos: un telegrafista de 1ª clase para que permaneciendo en la Comandancia enseñara este arte sucesivamente a todos los oficiales que sirven en la frontera; pues con un experimento que ya he hecho conozco que en muy poco tiempo, ellos solos servirían perfectamente la Oficina de cada uno de los fuertes. (Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice C-I.-

<sup>9659</sup> Gutiérrez, 1959, 284, 296 y 301.

<sup>9660</sup> Dicho desplazamiento se realizó en tres trenes específicamente condicionados que partieron de Retiro y de Palermo (Rodríguez, 1964, 91). Sobre las peripecias de ese viaje, ver Etchepareborda, 1968, 215.

<sup>9661</sup> Coronel ® Salvador Tula al Ministro de Guerra, Capital, 29 de Octubre de 1906 (AGE-Leg.12.161), reproducido completo en el Apéndice H-I.

- 
- <sup>9662</sup> Memoria de la Dirección General de Ferrocarriles Nacionales, 1895 a 1898 (Buenos Aires: Imp. Kraft), p.6
- <sup>9663</sup> Memoria de la Explotación de Ferrocarriles correspondiente al año 1893 (Buenos Aires: Compañía Sud Americana de Billetes de Banco), p.27.
- <sup>9664</sup> Declaración del Testigo Miguel Vigo en Río Cuarto 26-X-1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, f.294, reproducido íntegro en el Apéndice O-III.
- <sup>9665</sup> Etchepareborda, 1968, 282. Sobre el telégrafo militar y el sargento mayor Buratovich, ver García Enciso, 1982. "Los Sucesos de Córdoba", Caras y Caretas, 18 de febrero de 1905. El **Boletín Mensual de Correos y Telégrafos** publicaba mensualmente una Estadística de Telégrafos, en la cual describía el movimiento del personal. Esta descripción consistía en el apellido y nombre del empleado, su categoría, antigüedad, destino, y motivo de variación en el empleo. Las categorías censadas cubrían a los carteros, peones, guarda-hilos, balijeros, buzonistas, mensajeros, encargados de estafeta y ensobradores. Los motivos de variación en el empleo cubrían los fallecimientos, las renunciaciones, las separaciones del servicio, los abandonos, las vacantes, los ascensos, las exoneraciones, los retiros, y las nuevas creaciones de cargos. Esta valiosa información espera ansiosa a algún investigador experto en estadísticas que encare la tarea de informatizar y procesar esta valiosa información histórica del proletariado postal argentino.
- <sup>9666</sup> Ese fue el caso paradigmático del regimiento 1° de Artillería (Nellar, 1972, II, 353)
- <sup>9667</sup> Reincorporación por Justus, **El Diario**, 2-IX-1890.
- <sup>9668</sup> Reincorporación por Justus, **El Diario**, 2-IX-1890.
- <sup>9669</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (**El Diario**, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9670</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (**El Diario**, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II
- <sup>9671</sup> ver Nellar, 1972, II, 317, 324 y 364; y ver el caso del Regimiento 6 de Infantería de Línea en la Revolución de 1905 (AGE, Leg.292 o Leg.14.400).
- <sup>9672</sup> Nellar, 1972, II, 328, 329 y 345.
- <sup>9673</sup> Nellar, 1972, II, 315 y 329.
- <sup>9674</sup> Nellar, 1972, II, 327 y 356.
- <sup>9675</sup> Nellar, 1972, II, 316.
- <sup>9676</sup> Nellar, 1972, II, 318.
- <sup>9677</sup> Nellar, 1972, II, 320.
- <sup>9678</sup> Nellar, 1972, II, 348 y 351.

- 
- <sup>9679</sup> Coronel ® Salvador Tula al Ministro de Guerra, Capital, 29 de Octubre de 1906 (AGE-Leg.12.161), reproducido completo en el Apéndice H-I.
- <sup>9680</sup> Coronel ® Salvador Tula al Ministro de Guerra, Capital, 29 de Octubre de 1906 (AGE-Leg.12.161), reproducido completo en el Apéndice H-I.
- <sup>9681</sup> AGE-Leg.12.931, fs.238-241, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9682</sup> AGE-Leg.12.931, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9683</sup> AGE-Leg.12.931, fs.238-241, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9684</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9685</sup> AGE-Leg.12.931, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9686</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9687</sup> AGE-Leg.12.931, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9688</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9689</sup> AGE-Leg.12.931, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9690</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9691</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9692</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9693</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9694</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9695</sup> AGE-Leg.12.931, folio 238-241 de la DGP, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9696</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, en Apéndice H-III.
- <sup>9697</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III.
- <sup>9698</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III
- <sup>9699</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III
- <sup>9700</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III.
- <sup>9701</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III
- <sup>9702</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III
- <sup>9703</sup> AGE-Leg.12.931, fs.343, reproducido completo en Apéndice H-III
- <sup>9704</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-III).
- <sup>9705</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-III).

- 
- 9706 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9707 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9708 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9709 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9710 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9711 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9712 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9713 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9714 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9715 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9716 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9717 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9718 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9719 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9720 Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).
- 9721 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- 9722 Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).

- 
- <sup>9723</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9724</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9725</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9726</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9727</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9728</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9729</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9730</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9731</sup> Exposición presentada el 12 Octubre de 1908 al Tribunal de Clasificaciones de servicios militares, por el Teniente Coronel Don Pastor Marambio, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (AGE, Leg.7496 reproducido completo en Apéndice G-III).
- <sup>9732</sup> Para la virtud del dirigente en el campo de fuerzas diseñado por Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 58-67. Sobre la virtud guerrera y el diseño moral, ver Clausewitz, Libro III, cap.V; y Whicker, 2002 y 2004. Sobre los elementos morales en la teoría del Mariscal Foch, ver Luvaas, 1968, 111.
- <sup>9733</sup> sobre la noción de autoridad, ver Kojève, 2005.
- <sup>9734</sup> José María Uriburu fue nombrado en 1885 Jefe de la 1ª Brigada de la 4ª División del Ejército que ocupó la Línea del Bermejo bajo el mando del General Antonio Dónovan, y luego Jefe de la 3ª División destacada en Corrientes desde julio de 1893 hasta febrero de 1894. Era primo hermano del Presidente de la República José Evaristo Uriburu y del General Napoleón Uriburu. Era hijo de Pedro José Uriburu, exilado en Montevideo, y de Cayetana Arias Cornejo, estaba casado con Carmen Arias Murúa, y era padre de cuatro hijos.
- <sup>9735</sup> Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1887, p.343.
- <sup>9736</sup> Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1887, p.343.
- <sup>9737</sup> *La Prensa*, 25-IX-1892, p.4
- <sup>9738</sup> sobre el rol cumplido por el Código de Justicia Militar, ver Fazio,

---

2005. Sobre la codificación de la disciplina en Prusia, ver Mann, 1997, II, 556.

<sup>9739</sup> Sobre los factores morales en la guerra, ver Clausewitz, Libro III, capítulos 3 y 4.

<sup>9740</sup> Amén de los capítulos de Clausewitz ya citados, para los temas de ética militar y de la guerra, ver Christopher, 2004; Cook, 2004; y Hartle, 2004.

<sup>9741</sup> MacFarland, 1969, p. 154; y Seligman, 1975, p. 603.

<sup>9742</sup> Michels, 1979, 168.

<sup>9743</sup> Julio de Vedia al Sr. Ministro, Palermo, 14-XI-1879 (AGCMN, LCN, No.3, folio 253). La obra del Conde Guibert es reiteradamente mencionada en el libro de Ocampo, 2003; y en el de Fernández Vega, 2005, 64-65. Sobre el Conde Guibert, ver Palmer, 1968. Y sobre Jomini y la tradición clásica en el pensamiento militar, ver Howard, 1968; y Brinton, Craig y Gilbert, 1968.

<sup>9744</sup> Comunicación personal del Dr. Joaquín Meabe. Este texto fue comentado por el Jefe del Batallón 5° de Infantería de Línea Teniente Coronel José Alejandro Espeche en un escrito de marzo de 1895 titulado Informe crítico-analítico comparativo de la "Táctica para las Maniobras y el Combate de la Infantería" (AGE, Leg.4210). También fue comentado por el Teniente Coronel Angel Falcón el 1° de diciembre de 1894 (AGE-Leg.4368).

<sup>9745</sup> ***La Revue D'Artillerie, Preussische Jahrbücher, La France Militaire, Revue Militaire de l'Etranger, El Secolo*** (Milan), ***Le Courrier Francais*** y ***Nowoja Wremlya*** (Moscú). La ***Revue D'Artillerie*** se editaba en París desde Octubre de 1872 y operó hasta marzo de 1914. La ***Preussische Jahrbücher*** publicaba asiduamente los comentarios militares del historiador alemán Hans Delbrück (Craig, 1968b, 213 y 217). También polemizaban sobre temas de tecnología militar periodistas de ***La Nación, La Prensa, El Diario*** y ***El Tiempo***.

<sup>9746</sup> ver J. Digkirchen, seudónimo ignorado, del autor de "El ejército de línea y la milicia" (***El Diario***, 19 de Julio de 1892). Seis años después, el influjo del caso Dreyfus alcanzó en Buenos Aires la interna de la Escuela Superior de Guerra, por cuanto el Director de la misma, el Coronel Alfredo Arendt, aludió negativamente al Prof. Rolo von Kornatzki por estar casado con la hija del banquero judío Oppenheimer (Picciuolo, 2000, 84, nota 15).

<sup>9747</sup> Diario de sesiones, Cámara de Diputados, I, Imprenta del congreso, 1894, pag. 449. Debo esta relevante información a la desinteresada colaboración de mi colega correntino Dr. Joaquín Meabe.

<sup>9748</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1894, p.510-511.

<sup>9749</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, sesión del 27 de agosto de 1894, pag.613

<sup>9750</sup> Sobre la influencia de la Escuela Francesa (Bugeaud, Gallient, Lyautey) en la evolución del Ejército Argentino en la primera mitad del siglo XX, ver Esteban, 2005.

<sup>9751</sup> Castro Solano, 2005, 21.

- 
- 9752 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9753 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9754 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9755 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9756 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9757 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9758 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9759 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9760 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9761 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895). Extrañamente, Cutolo nada menciona de este grave incidente en la biografía de Solier (Cutolo, VII, 155). En su nota elevada al Ministerio, el Contralmirante Solier "recapitula todas las proposiciones hechas al superior por el jefe del estado mayor, se estiende en diversas consideraciones, reabre el capítulo de las pólvoras, los proyectiles, los comandos, y entre otras cosas, como pieza principal del fuego de artificio, las apreciaciones sumamente graves sobre la capacidad de algunos jefes de la armada a quienes el Ministerio de la Guerra ha confiado investigaciones de carácter científico que requieren una vasta ilustración técnica. El tono de la nota, es de esos que no se pueden soportar sin que la tolerancia se asemeje a cobardía: en toda ella campea un espíritu singularmente agresivo, una despreocupación deprimente para el superior, de los principios más elementales de subordinación y respeto, y conociéndola por referencias autorizadas, creímos encontrar en los diarios de esta mañana, la noticia de la exoneración del contralmirante Solier y tal vez su conjuración a bordo de un buque de la escuadra, para dar ejemplo de enérgica represión a los excesos de palabra y a las faltas de respeto en las relaciones de subordinados y jefes. Para nada de esto ha sucedido. Ni el ministro ha renunciado, ni ha sido reprimida la ostentosa indisciplina del jefe de estado mayor. Hasta cuando durará esta situación, solo puede fijarse midiendo el achatamiento ministerial y la vizcosa blandura del carácter presidencial" (Ecos del Día. Novedades ministeriales. Otra Nota del E. M de Marina, ***El Diario***, 24-VIII-1895).
- 9762 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9763 Disciplina Militar (***El Municipio***, 30-VIII-1895).
- 9764 Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (***El Diario***, 28-VIII-1895).
- 9765 Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (***El Diario***, 28-VIII-1895).
- 9766 Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (***El Diario***, 28-VIII-1895).
- 9767 Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (***El Diario***, 28-VIII-1895). Grapho, seudónimo de identidad inhallable pero que debería pertenecer a un militar muy probablemente José M. Castro Sundblad.

---

Grapho también colaboraba en **El Municipio**, de Rosario,

<sup>9768</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9769</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9770</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9771</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9772</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9773</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9774</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9775</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9776</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9777</sup> Democracia militar. Teorías peligrosas, por Grapho (**El Diario**, 28-VIII-1895).

<sup>9778</sup> Para los análisis teóricos sobre la obediencia, ver Levine, y Pavelchak, 1985, II, 62-70. Para la obediencia militar versus la competencia profesional y los valores no militares, ver Huntington, 1995, 84-87.

<sup>9779</sup> Possony, 1968, 118 y 121.

<sup>9780</sup> Weber, 1944, II, 885.

<sup>9781</sup> Miller, 2005, 268. Sobre las tesis de Milgram, ver Moore, 1996, 100-109.

<sup>9782</sup> La disciplina, como base de la táctica guerrera, era para Weber la madre tanto de la realeza zulú patriarcal, como de la polis helénica, la flota de Atenas y la democracia suiza (Weber, 1944, II, 885).

<sup>9783</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (**El Diario**, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II. Sobre la noción de obediencia pasiva en las monarquías absolutas, ver Figgis, 1982, 117 y 162

<sup>9784</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (**El Diario**, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II

<sup>9785</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército, **El Municipio**, 13-I-1892, reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.

<sup>9786</sup> El espíritu revolucionario y la disciplina en el ejército, **El**

---

**Municipio**, 13-I-1892, reproducido en forma íntegra en el Apéndice E-XXIII.

<sup>9787</sup> Ramírez, 1987, 226.

<sup>9788</sup> Punto Negro. Las Penas Militares, por Yaro (*El Diario*, 13-VIII-1890), reproducido íntegro en el Apéndice E-II

<sup>9789</sup> sobre la eventualidad de una guerra con Chile, ver Ramírez, 1987, capítulos 4 y 7. No me queda claro porqué razón esta tesis no ha sido publicada aún. Sobre la deliberación política de los militares Chilenos en el preludio de la Guerra Civil de 1891, ver San Francisco, 2005.

<sup>9790</sup> AGE, Legajos 7446, 12.513 y 3155. Sobre el caso Comas, ver Salessi, 2000, 362-372; y Bazán, 2004, 164-167.

<sup>9791</sup> Mendiá, 1890, II, 17; Galán, 1894, 30 y 50; y Etchepareborda, 1968, 217 y 218.

<sup>9792</sup> Bazán, 2004, 219-224

<sup>9793</sup> ver Herrera, 1930, 123.

<sup>9794</sup> Caballero, 1961, 102.

<sup>9795</sup> Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido completo en Apéndice I-I

<sup>9796</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9797</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9798</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9799</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9800</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9801</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9802</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9803</sup> Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco (AGE-Leg.886), reproducido completo en Apéndice I-IV

<sup>9804</sup> Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). reproducido completo en Apéndice I-III.

<sup>9805</sup> Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). reproducido completo en Apéndice I-III.

---

<sup>9806</sup> ver Trainor, 1984; y Sánchez-Parga, 2005, 352 y 416.

<sup>9807</sup> ver Colón de Larriátegui, 1817; y McAlister, 1953 y 1959.

<sup>9808</sup> ver Lynn, 1984, 118, citado en Mann, 1997, II, 556.

<sup>9809</sup> Sobre aplicación de medidas disciplinarias y de penas por faltas y delitos cometidos en el Ejército de la Revolución de Mayo, ver Nellar, 1971. Hemos recibido un ejemplar del Proyecto de Reglamento sobre las faltas de disciplina y sus penas proyectado por el teniente coronel Day y el mayor Maligne. Consta el folleto de 25 páginas, y en ellas se determina, con arreglo al Código, las penas que deberán aplicarse por los consejos de disciplina, y en tiempo de guerra por los jefes de cuerpo, buques, etc. Como el proyecto está a estudio de la Junta Superior de Guerra, nos abstenemos de entrar en mayores consideraciones, pero aplaudimos la iniciativa de sus autores, pues los cuerpos de ejército, tienen la mayor parte de la oficialidad ocupada en funciones de comisarios o de jueces, a causa de que en el código penal militar no hay reglamentación sobre los consejos de disciplina (*El Tiempo*, 20-V-1895)

<sup>9810</sup> Recién el 9 de junio de 1896, un año después de haberse iniciado la causa, se dio a conocer en la orden general del ejército la aprobación del fallo pronunciado por un consejo de guerra reunido en febrero último, para juzgar a dos oficiales del 3 de caballería. Esto demuestra "...que la justicia militar, entre sumario, consejo y aprobación superior, necesita alrededor de un año para dar por terminado un asunto en que se absuelve a los procesados o en que se les condena a un par de meses de arresto" (*El Diario*, 10-VI-1896). Los comisarios instructores de sumarios no solo eran tardíos en el cumplimiento de su misión, "...sino que resulta, las más de las veces, que sus actuaciones tienen vicios de nulidad que recién se nota cuando van a tratarse en consejos de guerra. La sección justicia del estado mayor debiera salvar esto, dando academias sobre procedimientos a los jefes y oficiales bajo sus ordenes, academias que bien podrían celebrarse en los cuerpos, de acuerdo con las prescripciones del régimen interno. Un consejo de guerra reunido ayer, ha declarado nulo por vicios de forma, un proceso instruido a un soldado acusado de desertión, después de llevar 14 meses de prisión preventiva" (*El Diario*, 1-X-1896)

<sup>9811</sup> En los cuarteles de la capital había en noviembre de 1896 "...arrestados por faltas disciplinarias y delitos militares no menos de treinta, entre jefes y oficiales no pertenecientes a cuerpo alguno. Todos estos arrestados no perciben prest, mientras están en esas condiciones, haciéndose el gasto de su alimentación a costa de la mesa de oficiales del cuerpo en que están arrestados. Los oficiales de los cuerpos, por intermedio de sus jefes han reclamado de este, pero la superioridad nada ha resuelto. El hecho es anómalo pues, o los arrestados no comen, o la mesa de oficiales se endeuda, o la caja del cuerpo carga con los gastos, que nunca son reembolsados" (*El Diario*, 25-XI-1896)

<sup>9812</sup> "En presencia de lo que está pasando con un centenar de presos que hoy hay en el ejército y la armada, de los cuales conocemos algunos que guardan arresto desde 18 meses a dos años, bueno sería implantar inmediatamente la corte marcial inglesa, conservando de los códigos la parte puramente penal a fin de que los jueces, con el criterio formado sobre la causa oída en pleno consejo se ilustren a la luz jurídica del caso dictaminando con más conciencia en cada caso. Conviene que el general Levalle consulte The Queen's Regulations: allí encontrará detalladamente la función y organización de las cortes marciales británicas, tan necesarias entre nosotros". Fuente: MILITARES-Justicia militar, *El Tiempo*, 3-IX-1897

<sup>9813</sup> Los tribunales eran "...tres para tropa, formado por oficiales subalternos, para oficiales y jefes por oficiales superiores, y para estos y los oficiales generales el consejo superior de guerra y marina: con el establecimiento de tribunales fijos se cree lograr rapidez en el procedimiento y justicia en los fallos, cosa que con los consejos de guerra ad hoc para cada reo no se obtiene. En el procedimiento se concede la apelación de parte, ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Se concede también a los jefes de estado mayor, la facultad de sobreseer los sumarios que no arrojen cargos contra los encausados, a fin de evitar que aquellos, como hoy es de procedimiento, tengan que ser elevados al Ministerio, para que este los pase en revisión al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que resuelva si procede el sobreseimiento, trámite que exige tiempo con perjuicio de los detenidos" (*El Diario*, 19-VI-1896)

<sup>9814</sup> En cumplimiento del fallo de la justicia militar, el ministerio de la guerra "...ha desglosado del proceso del coronel Meana la parte que se refiere al enjuiciamiento del general Winter y del comandante

---

Arzac. El juicio será seguido por el oficial instructor, comandante Ponciano Torres de acuerdo con los cargos formulados por el coronel Meana. Se le acusa al general Winter de abuso de autoridad, siendo jefe del estado mayor y al comandante Arzac de faltas de carácter administrativo cometidas, según se dice, en la época que desempeñaba el cargo de jefe del 1º de caballería. No se conoce el nombre del general que será encargado para levantar el sumario al general Winter, pero se cree que será el de la misma jerarquía, Cerri. Este proceso, como se ve, tiende a aclarar los hechos que fueron denunciados en su oportunidad y que por su magnitud dan lugar a muchos comentarios” (*El Tiempo*, 17-X-1895)

<sup>9815</sup> Del sumario instruido al teniente Eduardo A. Gibelli del regimiento 10 de infantería, por haber dado muerte al soldado Ocampo del 1er batallón, “...se deduce plenamente que aquel oficial ha procedido en defensa propia, castigando, en la forma que las leyes militares de todos los países prescriben, la insubordinación a mano armada. Fuente: Ejército y Armada” (*El Diario* 2/4 de abril de 1896). Probablemente el Teniente Eduardo Gibelli era hermano o primo del Teniente Enrique Gibelli (AGE-Leg.5317), quien había desertado de las filas de los Revolucionarios Radicales de 1905.

<sup>9816</sup> Todos los diarios se han apresurado a dar la noticia del motín y prisión de algunos soldados del regimiento 3º de caballería destacados en la línea de fortines del Limay, más precisamente en Junín de los Andes, pero ninguno se ha preocupado de estudiar las causas que han originado ese acto de indisciplina, o mejor dicho, de desesperación a que han sido arrastrados por las circunstancias en que se encuentran.

.....  
Eternamente a caballo, ya haciendo la policía de la frontera, ya en persecución de indios o desertores, ya rondando sus propias caballadas o en servicios anexos a su misión, a los tres meses de haber recibido el último vestuario está desnudo, porque no hay paño que tal uso resista. Duermen en el suelo sobre un pobrisimo recado de cueros de carnero, de su propiedad particular, porque el gobierno le da solo una despreciable manta para cama. ¡El soldado en campaña no cuenta con una tarima donde recostar el fatigado cuerpo! No se le dan cepillos, no se le dan útiles de limpieza, como tampoco se le dan medias para resguardar el pie de la nieve de la cordillera, que huella a cada momento¡

.....  
A esto debemos agregar los trabajos que se ven obligados a efectuar en beneficio de sus jefes. En los momentos en que el servicio les deja libres, son transformados en peones, en esclavos destinados a las más rudas tareas y dedicados a toda clase de trabajos. No exageramos: muchas obras podríamos citar, y entre ellas la espléndida estancia que posee sobre el Río Negro, el jefe del regimiento 3, coronel don Pablo F. Belisle, donde hemos visto, por repetidas veces, compañías enteras haciendo el servicio de albañiles, carpinteros, quinteros, peones, cuanto era menester (*El Tiempo*, 17-I-1895). Hace varios meses al marinero Julián López se le aplicaron cuarenta azotes durante tres días consecutivos, a son de dianas y en presencia de toda la tripulación formada, y a consecuencia de los cuales pasó el mencionado marinero a la enfermería. Restablecido de las contusiones, desertó el marinero López en compañía del cabo José Rojas y marineros Gregorio García y Juan Follada, los que fueron capturados en esta capital y sometidos a un consejo de guerra del cual salieron absueltos, sin explicarnos el porqué de esta sentencia, cuando eran convictos y confesos del delito de deserción. Menos aún nos explicamos este resultado del consejo de guerra, cuando los citados marineros han hecho declaraciones graves acerca del tratamiento que se daba a la tripulación, y mayormente aún, cuando estos castigos, impuestos por un capitán, durante la ausencia de los jefes superiores, consta en los libros del buque (*El Tiempo*, 30-IX-1897)

<sup>9817</sup> *El Tiempo*, 17-I-1895. Se dispuso que el comandante del piquete sublevado en Junín de los Andes, teniente Benjamín Caballes, sea dado de baja absoluta del ejército pues fugó sin poner de su parte esfuerzo alguno para contener a sus soldados (*El Tiempo*, 29-I-1895)

<sup>9818</sup> *El Tiempo*, 17-I-1895. Se dispuso que el comandante del piquete sublevado en Junín de los Andes, teniente Benjamín Caballes, sea dado de baja absoluta del ejército pues fugó sin poner de su parte esfuerzo alguno para contener a sus soldados (*El Tiempo*, 29-I-1895)

<sup>9819</sup> Sobre la violencia y la crueldad del poder político en Maquiavelo, ver Sánchez-Parga, 2005, 351-355. En la orden general del E.M. del ejército se dio a conocer en octubre de 1897 la siguiente sentencia, confirmada por el presidente de la república: “Vista esta causa contra el mayor don José M. Silva, acusado de violencias cometidas en el desempeño de una comisión en el mes de septiembre de 1896, estando el referido jefe encargado de enganchar individuos para el ejército, y resultando que la acusación procede de los siguientes hechos: 1º Haber hecho detener en el calabozo de la comisaría de Ramallo el día

---

24 de setiembre del año de 1896 a diez y ocho ciudadanos de esa localidad; 2º Haber cometido actos vejatorios contra los mencionados ciudadanos durante su detención; y 3º Haber hecho conducir a los mencionados individuos contra su voluntad a San Nicolás de los Arroyos. Y considerando el consejo por mayoría de votos que ninguno de los mencionados hechos está probado: Falla—Que debe absolver y absuelve de culpa y cargo al procesado, disponiendo sea puesto en libertad y restituido al ejercicio de todos sus derechos, con arreglo a los dispuesto en el art.207 del código de procedimientos militares. El presidente de la república ha confirmado también la sentencia dictada por el Consejo Supremo, condenando al soldado del 4 de artillería, Moisés Medina, por insubordinación a mano armada, a la pena de presidio por tiempo indeterminado” (MILITARES-confirmación de sentencias, *El Tiempo*, 30-IX-1997).

<sup>9820</sup> ver el célebre caso del Cabo Paz, ajusticiado por ultimar a su superior, un jefe de regimiento, hecho acontecido en 1935 (Carreras, 1974), y de cuyas resultas se produjo en Tucumán una algarada popular, de la cual resultó el incendio del Jockey Club local. En febrero de 1896 “...se le dieron al sargento 2º, Pedro Aranda, 25 palos por no ir a hablar a un asistente cuando el teniente Amarante se lo indicaba. Ese castigo fue impuesto en el departamento de Chilecito, delante de varios ciudadanos y del jefe de la Comisión de Límites con Chile, mayor Montes, que se hallaba de paso en ese departamento para Jáchal” (*El Tiempo*, 10 de febrero de 1896)

<sup>9821</sup> Sobre el incidente de que fue víctima el 5 de junio de 1896 en el campamento de Curumalán el teniente Federico Kruls (sobrino carnal del jefe del cuerpo Teniente Coronel de Guardias Nacionales Ramón A. Arriola), del batallón 2º del regimiento 10, “...puedo comunicar que aún no está suficientemente esclarecido el hecho, respecto al cual circulan en el campamento distintas versiones. Una de las versiones circulantes presenta al capitán Juan Carlos Castex, que también pertenece al batallón 2º del regimiento 10, como declarado opositor a que los oficiales de su compañía tuviesen asistentes, y en consecuencia se agrega que constituyó en arresto al asistente del teniente Kruls, hecho que no fue comunicado a este por el oficial de semana. Parece que Kruls dio a este orden de constituirse en arresto, pero el capitán Castex lo puso en libertad, dando a su vez orden de arresto al teniente Kruls. ...Que el capitán Castex puso en libertad al sargento y ordenó el arresto del teniente Kruls, orden que originó un reclamo de este a la mayoría del cuerpo. Más tarde Castex se encontró con Kruls en el cuerpo de guardia y según se dice le incriminó duramente su conducta, cambiándose palabras con este motivo y retirándose Castex a su carpa. Por la noche, según la misma versión el Capitán Castex buscó al teniente Kruls y encontrándolo a pocos momentos tuvo con él otras palabras, descerrajándole un tiro de revolver en el pecho, sin que Kruls hiciera uso de armas. El sumario no tardará en aclarar este lamentable suceso sobre el cual se hacen aquí tristes comentarios” (CURUMALAN La muerte del teniente Kruls. Versiones del hecho. El sumario, *El Diario*, 5-VI-1896). Campamento de Curmalal, jueves 4.—A fin de evitar una sorpresa dolorosa a la familia Kruls, no he dado cuenta en mi telegrama anterior de un incidente sangriento que tuvo lugar en la noche del martes, entre el capitán Castex y el teniente segundo Federico Kruls, ambos del 2º batallón del regimiento 10º. El hecho se ha producido de la manera siguiente: Se encontraba de servicio de semana en la mañana de ese día el teniente Kruls, cuando al salir de su alojamiento observó que estaban todas las carpas de su compañía desarmadas, razón por la cual llamó al sargento de semana y lo amonestó por no haberle dado cuenta de esa novedad como era de su deber, por lo que se le ordenó que guardara arresto en la guardia. Momentos más tarde el capitán Castex ponía en libertad al sargento y le ordenaba al teniente que a su vez pasara preso. Como éste encontrara injusta la orden, se dirigió a la mayoría para presentar su queja y de vuelta a la cuadra encontró a uno de los soldados que estaba de plantón e hizo llamar al oficial que había impuesto ese castigo. Como éste se negar a darle los motivos del castigo, le impuso arresto. Inmediatamente que esto llegó a oídos del capitán Castex, se presentó al cuerpo de guardia en donde accidentalmente se encontraba el teniente Kruls; allí lo amonestó y le increpó dura e injustamente su proceder retirándose en seguida a su carpa para volver breves minutos después y encontrar en su camino al subteniente Urien, a quien no conoció a causa de la oscuridad y le llamó creyéndolo el teniente Kruls, notando Urien que Castex llevaba la mano en el bolsillo trasero del pantalón. Conociendo su error, Castex siguió más adelante y frente al cuerpo de guardia encontró a Kruls, y después de cambiar con él algunas palabras de las cuales no se ha conseguido saber el significado, le abocó el revolver al pecho y le hizo un disparo hiriéndolo de muerte. Esta mañana a las 10 a.m. dejó de existir el teniente Kruls después de horribles sufrimientos. La impresión desagradable que ha causado este crimen en la división, es fácil explicársela” (En CURAMALAL-- INCIDENTE SANGRIENTO Muerte del Teniente Kruls por el capitán Castex-Antecedentes del hecho. Los Restos de la Víctima-Otro Suceso Desgraciado. Soldados heridos-Fallecimiento del sargento Lee, *La Nación*-5 de junio de 1896) No se conocen bien los detalles, el origen mejor dicho, de este hecho: pero

---

puedo afirmar con la opinión dominante en el teatro del suceso, que los juicios alrededor del doloroso acontecimiento son totalmente adversos al heridor, que tiene para mayor desgracia antecedentes de sucesos análogos —la muerte violenta del señor Sanfuentes en Mendoza, entre otros— que ahora se evoca y se comenta de una manera abrumadora. Este preso, con centinela de vista y bajo la acción indagatoria de la justicia. Kruls es muy estimado de sus compañeros de batallón y de la tropa de su compañía, distinguiéndose por su contracción, su carácter bondadoso y su espíritu de subordinación. Los que le conocen no aceptan la más remota presunción de que él haya obligado de ninguna forma a que Castex hiciera uso de sus armas. Hoy por hoy, la situación de éste con respecto a los antecedentes del incidente y a los medios en que ha tenido desenlace, es, lo repito, abrumadora, difícil, pero no debo recoger versiones absolutas y terminantes que toca sólo a la justicia militar recoger para pronunciarse después. Fuente: *La Nación*-6 de junio de 1896

<sup>9822</sup> El presidente de la república puso en noviembre de 1897 el cúmplase a la siguiente sentencia del consejo supremo: “Vista la causa instruida contra el teniente 1° del 2° batallón de conscriptos del 7° regimiento de infantería de línea, don Fabián S. Luján, acusado del delito de homicidio, y resultando estar probado: 1° Que el procesado fue nombrado el 18 del mes de abril del corriente año, de patrulla de agresión para hacer el servicio de avanzada con 11 soldados de su mismo batallón. 2° Que el procesado trató de sorprender como a las 12 de la noche del 18 del mes de abril del corriente año la línea de centinelas de la gran guardia, y que siendo rechazado, al ser perseguido, por sus supuestos enemigos, hizo tres disparos con su revolver. 3° Que durante la persecución el soldado del mismo batallón y regimiento Conrado Ferreira, fue herido de bala. 4° Que la herida recibida por el soldado Conrado Ferreira fue causada por los disparos del revolver del procesado. 5° Que el soldado Ferreira falleció el día veinte de abril del corriente año, a consecuencia de la herida de bala recibida. Y considerando que el homicidio cometido por el procesado no tiene causa justificativa o eximente de pena ni circunstancia, agravante ni atenuante, el consejo de guerra falla que debe condenar y condena al procesado teniente 1° don Fabián S. Luján a la pena (por mayoría de votos) de seis meses y medio de prisión, a contar desde el día en que fue constituido en prisión preventiva con arreglo al inciso 2° del artículo 18 del código penal ordinario” (*El Tiempo*, 3-XI-1897)

<sup>9823</sup> La historia de Pedro Perlaitá (1860-1895), signada por funestos designios, “...encierra un trasfondo sentimental digno de mencionarse, que le granjearon en su momento la admiración de sus contemporáneos. Poseído de extraordinaria entereza evidenciada en trances de dura prueba, cuando los hombres sucumben presos de la desesperación, supo enfrentar contingencias extremas con serena altivez, sentimientos que solo son atributo de seres de su envergadura. Hacia el año 1893 acampó en las inmediaciones del pueblo de Empedrado el Regimiento No.12 de Caballería, al mando del Coronel José M. Uriburu, en el cual revistaba el soldado Perlaitá. Al poco tiempo, nació una corriente amistosa entre las tropas y los habitantes del lugar, donde es proverbial la hospitalidad provinciana. De esa mutua simpatía surgieron, forzosamente numerosos noviazgos, aunque nadie presentía que la tragedia andaba acechándolos. El oficial Julio López fue de los primeros en prendarse de una dama lugareña, con quien vivió apasionado enamoramiento. Pero ocurría que su subordinado también la cortejaba subrepticamente, siendo correspondido por la voluble joven. No es necesario abundar en consideraciones superfluas, para que el lector menos avisado advierta la gravedad del caso. Al tomar conocimiento del furtivo idilio, el militar herido en su hombría empezó a hostigar al subalterno. En cierta ocasión lo hace objeto de castigos corporales con su sable, entonces Perlaitá enajenado de ira promete vengar el ultraje y en la primera oportunidad que el destino vuelve a enfrentarlos, la desgracia tiñe con sangre las rutinarias maniobras del cuerpo, sacudiendo a la apacible población con la triste nueva: el subordinado había dado muerte al superior. Varios resultaron los pedidos de clemencia para el reo, y como hecho anecdótico aún se comenta que el aplazamiento de la sentencia emanada de las más altas autoridades castrenses, llegó con atraso cuando todo ya era irremediable. El hecho impresionó con caracteres propios a la gente; en tanto, comenzaba a gestarse un sentimiento de conmiseración hacia el caído. Desde esa remota fecha, su sepultura en el cementerio San Roque de la localidad convoca a contingentes de devotos, que le efectúan promesas y rogativas. La tosca edificación luce una llamativa pulcritud, merced a los cuidados que le prodigan estudiantes en períodos de exámenes, cubriéndola con pinturas de tonalidades celestes o plateadas, como una muestra mas de la vigencia del culto a ese hombre, cuya capacidad para obrar prodigios sobrevivió a su propia muerte” (Emilio Noya, *Corrientes entre la leyenda y la tradición*, en *Corrientes entre la leyenda y la tradición*, capítulo 7, Todo es Historia, Buenos Aires, Octubre de 1987, 3-13. Debo esta fascinante referencia al Prof. Andrés Salvador.

9824 **L'Operaio Italiano** de hoy, nos trae la nota del día. Se trata de una paliza feroz en el cuartel del 10 de infantería a un pobre soldado, según se denuncia. Sin mas comentarios traducimos de L'Operaio: En el cuartel del Parque, ha tenido lugar ayer en pleno día, en presencia de muchos soldados y particulares, un hecho censurable que haría dudar de la civilización de un pueblo donde no fuese pronto y rigurosamente castigado. Eran cerca de las dos y media, cuando dos soldados del 10 de infantería, por orden recibida de un teniente, se acercaron a un camarada de ellos, el cual estaba preso con grillos. Lo agarraron por el pecho y lo llevaron a otro sitio del cuartel. Allí le quitaron la chaquetilla y sujetándolo por el brazo, lo obligaron a mantenerse en posición de un hombre crucificado. Un sargento desenvainó la bayoneta y descargó sobre el soldado una multitud de palos. El pobre soldado cayó una o dos veces al suelo, desmayado, pero como el sargento no le había dado los cincuenta o sesenta palos que el bravo teniente había ordenado, los dos lo levantaron nuevamente y el sargento continuó a propinárselos con la bayoneta, ya sanguinolenta, con un celo digno de mejor causa, hasta concluir el humillante cargo que había recibido. Después de lo cual el mártir de una disciplina bárbara fue a caer malamente al suelo, pero la tortura no había terminado. Temiendo que los dolores le arrancaran lamentos, un soldado recibió la orden de ponerle la mordaza, con la que permaneció media hora en el suelo. Si el soldado no ha sido transportado al hospital, debe hallarse todavía en el Parque y su cuerpo dará demasiada fe de cuanto hemos dicho. (Fuente: Un Soldado Torturado. Denuncia de un diario italiano. Sesenta palos y mordaza. En El Parque, **El Tiempo**-jueves 18 de junio de 1896) Tomando en consideración la denuncia hecha hoy por **L'Operaio Italiano**, de haber sido apaleado un soldado del batallón 10 de infantería de línea por orden del teniente Graciano, se ha mandado instruir el correspondiente sumario para la averiguación del hecho, que ocurrió ayer. La denuncia agregaba que dicho soldado había sido sometido a un tratamiento de martirio en formas contrarias completamente a las exigencias de la disciplina. El soldado se llama Nicolás Tejeda y los antecedentes sobre su conducta no son favorables, presentándolo por el contrario como un individuo peligroso. Ayer Tejeda insultó al Teniente Graciano, llamándolo cobarde, y este oficial, según lo ha declarado el jefe del batallón coronel Teófilo Fernández, tuvo que ponerle una mordaza para evitar el escándalo de los gritos de Tejeda que conmovían a todo el barrio. No es exacto que se le pusieran grillos en aquel momento, pues los tenía desde tiempo atrás, porque Tejeda está condenado a 16 años de presidio por haber dado muerte a un soldado del batallón 6°. Una vez en el calabozo, el soldado le tiró al teniente Graciano una trompada, por lo que éste le dio unos palos. Lo sucedido no es de extrañarse y ha de repetirse en estas o análogas formas, mientras subsista la grave irregularidad de convertir el ejército de línea en guardia de criminales. Ejemplares como Tejeda hay varios en el batallón 10. (Fuente: El suceso del batallón 10. Un soldado apaleado. Instrucción de un sumario **El Diario**, 18-VI-1896).

9825 Hace varios meses al marinero Julián López se le aplicaron cuarenta azotes durante tres días consecutivos, a son de dianas y en presencia de toda la tripulación formada, y a consecuencia de los cuales pasó el mencionado marinero a la enfermería. Restablecido de las contusiones, desertó el marinero López en compañía del cabo José Rojas y marineros Gregorio García y Juan Follada, los que fueron capturados en esta capital y sometidos a un consejo de guerra del cual salieron absueltos, sin explicarnos el porqué de esta sentencia, cuando eran convictos y confesos del delito de desertión. Menos aún nos explicamos este resultado del consejo de guerra, cuando los citados marineros han hecho declaraciones graves acerca del tratamiento que se daba a la tripulación, y mayormente aún, cuando estos castigos, impuestos por un capitán, durante la ausencia de los jefes superiores, consta en los libros del buque. Fuente: MILITARES-castigos en el Garibaldi, **El Tiempo**, 30-IX-1997

9826 Tortura de un soldado del 10 de Infantería-Denuncia grave. Nos ocupamos días pasados de la tortura aplicada al soldado del 10 de Infantería Juan Cielo, que se asiste en el Hospital de Paraná. He aquí las informaciones que trae **La Libertad** (Paraná) de esa ciudad: Cuando intentamos interrogarlo, se presentó un soldado del 10 de Línea, con fornitura y armas, prohibiéndonos que hablásemos con el preso, pues esa orden tenía. Los ojos del soldado Cielo querían salir de sus órbitas, y parece que en medio de sus dolores concentraba su alma toda en la mirada con un destello de supremo ruego. Quiso hablar, pero una arcada de sangre se lo impidió. Nos decía la hermana que sustituía a la Superiora: -Mire, señor, hace 8 días pretendían sacarlo. Vino un sargento que a todo trance quería llevarlo, y en ese tiempo el enfermo estaba moribundo y nosotras nos opusimos hasta que viniese el médico y este se opuso igualmente. Después han tratado varias veces de sacarlo. Hoy mismo señor, unos oficiales querían llevárselo para curarlo en el cuartel. Cuando trataron de incorporarlo, los vómitos de sangre se sucedieron. La hermana superiora al presenciar este hecho se descompuso y aún sigue indispuesta. Viendo que no era posible sacarlo, mandaron esa guardia que Vd. ve para que el enfermo no hable con nadie. Cielo es un hombre de 28 a 30 años, de complexión robusta y de músculos fuertes, y es de suponer la magnitud de la paliza, por el estado

---

en que aquel pobre organismo ha quedado. Fuente: MILITARES-Tortura a un soldado, El Tiempo, 16-IX-1897

<sup>9827</sup> Se ha fallado la causa seguida a los jefes de infantería de marina, comandante Valdés y mayor Caraballo. Empezó el sábado la vista, y terminó ayer. Las defensas han sido de los doctores Estanislao Zeballos y J. Caraballo. Condena al comandante Valdés a un año de prisión por aplicar el castigo de grilletas, y al mayor Caraballo a tres años de prisión por inutilizar dos fojas de un libro copiador, que contenía una nota que en su contra pasó al gobierno el anterior jefe comandante Grigera. Este libro copiador recién empezado, no estaba en el inventario de la mayoría, pero el consejo ha interpretado el caso como destrozo de documentos públicos. Fuente: MILITARES-juicio Valdéz-Caraballo, El Tiempo, 21-VI-1898

<sup>9828</sup> Se ha mandado poner el cúmplase al acuerdo y fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que declara firme y verdadera la sentencia del consejo de guerra que por el delito de motín, condenó al cabo Justino Sánchez, del regimiento 3 de caballería de línea, a la pena de ser pasado por las armas —pena que en el mismo decreto se conmuta por la de presidio por tiempo indeterminado— al trompa Carmelo Rodríguez y soldados Jacinto Castro, Miguel Burgoa y Martín Rodríguez, cómplices de igual delito y del mismo regimiento, a la pena de doce (12) años de presidio; y a los soldados Gustavo Gavela, Lorenzo Gil, Pantaleón Zárate, Emilio Rojas, Saturnino López y Ramón Menseguez, cómplices del delito y del mismo cuerpo, a la pena de diez (10) años de presidio —los que deberán sufrir los reos en la Isla de los Estados— debiéndoseles computar en la proporción de la ley, la prisión sufrida desde el 28 de mayo de 1895. Fuente: MILITARES-Sentencias de los consejos de guerra, El Tiempo, 30-XII-1997

<sup>9829</sup> Para una mirada filosófica al liderazgo y la ética de responsabilidad militar, ver Paquet, 1996. Sobre la naturaleza autoritaria del poder carismático, ver Aronson, 1998, 232. Sobre las diferencias entre el liderazgo democrático y el liderazgo autoritario, ver Abric, 1985, 241-243.

<sup>9830</sup> Sobre el caudillismo, ver Haigh, 1964; y Wolf y Hansen, 1967. Sobre la naturaleza patrón-clientelar y patrimonial del caudillismo, ver Safford, 1991, 62-65 y 98-101.

<sup>9831</sup> Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido completo en Apéndice I-I. Acerca de Clausewitz y la tesis del primado de las fuerzas morales, ver Fernández Vega, 2005, 98 y 155.

<sup>9832</sup> Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido completo en Apéndice I-I

<sup>9833</sup> Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido completo en Apéndice I-I

<sup>9834</sup> Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña), reproducido completo en Apéndice I-I

<sup>9835</sup> Weber, 1944, II, 765. Sobre duelos, honores, leyes y derecho en Argentina (1887-1923), ver Gayol, 1999. Sobre la política y la tecnología del honor en México durante el Porfiriato y la revolución, ver Piccato, 1999. Sobre la ley penal y las "leyes caballerescas" en el Uruguay, 1880-1920, ver Parker, 1999. Sobre el duelo en la historia, el derecho y la institución castrense, que incluye la reproducción de una carta de Belgrano a San Martín sobre el duelo entre oficiales jóvenes, ver Rivanera, 1954.

<sup>9836</sup> Sobre padrinazgos militares de duelos entre civiles (1906-1914), ver Listado L-VI. Para el duelo a sable celebrado en un cuartel en 1894 por los Capitanes César Petit de Murat y José Sassi, ver AGE, Leg.12.162, fs.197-198.

---

<sup>9837</sup> MILITARES-Duelo Alaniz-Fuensalida (El Tiempo, 15-XII-1897). El teniente coronel Baldrich hizo una brillante defensa del subteniente Alaniz. He aquí los últimos párrafos de su trabajo: “Cuando la humanidad sea perfecta, el duelo será una traición, una sombra y no un hecho. El código que sin proscribirlo hoy, lo reglamentara, lo alejaría de las prácticas humanas y el porvenir, por la evolución de las ideas, lo mataría sin remedio. Entre tanto, el ejército debe vivir alimentando en sus filas caracteres impetuosos y viriles sin crueldad, corazones orgullosos sin petulancia; espíritus altaneros sin provocación; almas cultas sin debilidad; caracteres, almas, espíritus y corazones altivos, bravíos y celosos del decoro propio, y del honor del uniforme. Pueden ser generosos para perdonar, pero deben estar prontos para castigar toda injuria, prudentes y tolerantes en suma, y en la medida humana, nunca pusilánimes ni cobardes, el militar tiene el deber de ser insospechable; ¿Estas virtudes deben castigarse en el subteniente Alaniz? Fuente: MILITARES-Duelo Alaniz-Fuensalida, El Tiempo, 15-XII-1897.

<sup>9838</sup> Art.51 de la Ley 9675, de 1915, reglamentada por decreto del Presidente Victorino de la Plaza en 1916.

<sup>9839</sup> Existían en otras profesiones tribunales de honor, tal el caso de los médicos, abogados y escribanos.

<sup>9840</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9841</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II. De la memoria presentada en 1896 por el coronel Rosendo Fraga, jefe de la brigada de Santiago del Estero tomamos lo siguiente, que revela la moral del soldado santiagueño: “Un conscripto, dice la Memoria, perdió el fusil. Se emplearon todos los medios de averiguación, se agotaron los recursos de procedimientos en esos casos y el fusil no aparecía. Entre tanto el soldado estaba preso en la guardia de prevención, incomunicado necesariamente. Por fin pidió que lo llevaran a la presencia de su jefe, y desenvolviendo un rollo de papel, sacó el dinero de sus dos meses de sueldo que días antes había recibido, y que quizá guardaba para su familia, y los entregó al jefe en pago del fusil que se le había extraviado. Por casualidad apareció más tarde el fusil extraviado, y el arrestado probó su inocencia (*El Diario*, 7-VII-1896)

<sup>9842</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9843</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9844</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9845</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9846</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9847</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9848</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9849</sup> Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7446), reproducido completo en Apéndice I-II

<sup>9850</sup> Rouquié, 1981, I, 93.

---

<sup>9851</sup> Sobre el espíritu de cuerpo en el ejército argentino moderno, ver Rouquié, 1981, I, 84 y 87.

<sup>9852</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9853</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9854</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9855</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9856</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9857</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9858</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9859</sup> La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles, reproducido completo en el Apéndice I-IX.-

<sup>9860</sup> sobre el espíritu de cuerpo, de arma o de fuerza, ver Rattenbach, 1958, 50-55.

<sup>9861</sup> Sobre los militares en el Jockey Club y el Círculo de Armas de Buenos Aires, ver Rouquié, 1981, I, 118.

<sup>9862</sup> Instrucción y preparación de las tropas de Infantería en el Ejército Alemán por Carlos Funes (1906) (AGE-Leg.4920), reproducido completo en Apéndice I-VI.

<sup>9863</sup> Herrera, 1930, 52; y **La Nación**, 3-IV-1892.

<sup>9864</sup> El Ejército en estos días (**El Municipio**-17-I-1892)

<sup>9865</sup> Sobre colonos, mensús y confinados, ver Viñas, 1982, 126-132.

<sup>9866</sup> Sobre la composición del cuerpo de oficiales del Regimiento 1º de Artillería, ver Mendiá, I, 19, 83 y 265. Esta singular obra –que pude consultar merced a la generosidad del Prof. Joaquín Meabe y cuya reedición es difícil entender como no se ha producido aún-- es en verdad una original compilación de medio centenar de testimonios escritos por los oficiales que acaudillaban los diferentes cantones, revolucionarios y contra-revolucionarios. En el primer volumen declaran Anacleto Espíndola, Enrique S. Pérez, Leandro Anaya, Torcuato Harbin, Pablo Rauch, Justo González Acha, Domingo A. Bravo, Emilio Miliavaca, Mariano de la Riestra, Fernando Cabrera, Aurelio Figueroa y Miguel E. Molina. En el segundo volumen declaran Eduardo O'Connor, Ricardo A. Day, José García, Desiderio Rosas y Racedo, Martín E. Aguirre, Zacarías Supisiche, S. Anaya, Donato Alvarez, Juan G. Díaz, Modesto Torres, Saturnino Lara, Honorio Iturre, Félix Adalid, Ramón Aberastain y Oro, Miguel E. Molina, Francisco Smith, Rodolfo Krakenstein, Jorge Reyes, Nicolás H. Palacios, Alejo Belaúnde, Nicolás Palavecino, Odilón Stubane, Manuel de la Serna, Juan M. Calaza, B. S. Cordero, Daniel de Solier, Miguel Malarín, Rodolfo Mon y José Ignacio Garmendia.

<sup>9867</sup> Nellar, 1972, II, 353. Sobre Napoleón Uriburu, ver Siegrist de Gentile, 1997; y Fernández Lalanne, 1998. Uriburu fue Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. Era hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casó en 1869 con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y fue suegro del Coronel Pablo Escalada Saavedra. En oportunidad de la Revolución del 90 tenía cuarenta años largos, y era hermano del que luego fue Presidente de la República José Evaristo Uriburu (1895-98); primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (1895-99), del Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro, y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón; y tío segundo del Dictador José Félix Uriburu.

---

Uriburu tenía en Salta en la década del 70 sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y "...sublevará más tarde los de Yrúa y Santa Victoria". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.; y AGE, Leg.13.204). Según refiere Cutolo en su Diccionario Histórico y también Siegrist de Gentile, Uriburu se ensañó con las tribus Tobas y en defensa de los numerosos obrajes madereros instalados en el Chaco, a los cuales proveía con mano de obra indígena en condiciones de servidumbre. Este hombre funesto, a juicio del Gobernador Autonomista de Salta Francisco J. Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición administrativa ni se puede cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, porque todo lo interrumpe y lo desbarata y persigue, y destierra a los que son amigos del gobierno". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.). Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel Napoleón Uriburu en Salta obedeció a un plan gestado por el Presidente Avellaneda en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha (Torino y Figueroa de Freytas, 1982, 279).

<sup>9868</sup> Lamentablemente, las Resoluciones del Ministro de Guerra Nicolás Levalle, por las cuales este Regimiento fue trasladado en sendas oportunidades, no han podido ser corroboradas, por cuanto el Boletín del Estado Mayor General del Ejército correspondiente al año 1891 desapareció del volumen que lo contenía, existente en la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército. Este acto de vandalismo intelectual ocurrió hace ya tiempo, pues quien lo sustrajo dejó entre las páginas sobrevivientes una vieja cicatriz. Probablemente, la substracción haya obedecido a que cuatro años después del trágico acontecimiento aquí relatado asumía la Presidencia de la República el hermano del General Napoleón Uriburu, o más recientemente haya obedecido a que los turiferarios de turno, que nunca faltan, hayan querido quedar bien con el Presidente Juan Domingo Perón, sobrino carnal de uno de los vocales del Consejo de Guerra integrado en Formosa, y cuyo muy escueto legajo personal de apenas tres fojas sugiere que se trataba de un deudor contumaz (AGE, Leg.10.012).

<sup>9869</sup> Archivo General del Ejército (AGE), Leg.8636. El diario **La Nación** informa el 11 de agosto de 1891 que la tropa habrá de nutrirse de "...los reclutas del depósito de Río Cuarto, cuya institución se trata de suprimir" (**La Nación**, 11-VIII-1891).

<sup>9870</sup> Reglamento Táctico de Maniobras de Artillería de Campaña (AGE, Leg.3684).

<sup>9871</sup> Oficina administrativa de una unidad de tropa donde se prepara, formula y archiva tosa la documentación referente a la administración de la unidad.

<sup>9872</sup> La guardia de prevención la compone el servicio nombrado diariamente por el Gefe del Cuerpo y tiene por objeto la vigilancia del Cuartel y hacer cumplir los castigos que se imponen a la tropa y custodiar las salas de disciplina y de prisión si los hubieran, se considera cumplido el servicio de prevención cuando este ha sido relevado por otro, que generalmente cuando no ocurre caso extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas (reproducido íntegro en el Apéndice H-V).

<sup>9873</sup> El Coronel Ruiz Moreno era hijo de un emigrado unitario Manuel Ruiz Moreno, nacido en San Pedro, y de Dolores del Pardo, y era hermano del Coronel Octavio Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1985, 62).

<sup>9874</sup> AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No.3, 21-III-1878, folio 197.

---

Nacido en Santa Fé en 1855, pertenecía a la 5ª Promoción del Colegio Militar, que había egresado en 1878, y contaba en 1891 con 36 años de edad (Figueroa, 2001, 109). Fueron sus camaradas de Promoción el duelista de triste memoria Coronel Carlos Domingo Sarmiento y el escritor Agustín Álvarez (a) Fray Mocho.

<sup>9875</sup> Coronel Simón Santa Cruz al Comandante Joaquín Viejobueno, Palermo, 22-X-1886 (Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 441).

<sup>9876</sup> hijo de Antonio López y Dorotea Zamora, vecinos de Santa Fé (AGE, Leg.6984).

<sup>9877</sup> La chirinada era en el lenguaje popular un cuartelazo o movimiento insurreccional abortado, que proviene del Sargento Chirino, personaje representado en la obra teatral Juan Moreira, quien persigue al bandolero o gaucho matrero.

<sup>9878</sup> AGE, Leg.23, fs,3v..Declaración del 2º Jefe del Regimiento Tte. Cnel. Federico López. Cabe aclarar que este particular y valioso sumario fue posible consultarlo porque a diferencia de la mayoría de los mismos, no fue desglosado del legajo personal del Cap. Abogado. La reglamentación establece que los legajos personales son eternos, pero los sumarios y procesos al cumplir medio siglo son descartados sin microfilmear, aduciéndose en descargo de esta política documental la falta de espacio.

<sup>9879</sup> Mendiá, 1890, II, 148.

<sup>9880</sup> Era hermano mayor de Enrique Abogado, quien alcanzó el grado de General, pero que extrañamente firmaba su apellido Abogado con la v.

<sup>9881</sup> En Septiembre de 1895 el General Francisco Reynolds le extiende los pasajes para que baje a la Capital a curarse de su enfermedad (AGE, Leg.23). Con posterioridad desposó con Amelia Rebollo, pero no tuvieron descendencia.

<sup>9882</sup> AGE, Leg.8636. Tres años antes, en 1894, el Coronel Alejandro Azopardo dijo de él que "...si este oficial entraba de servicio cometía falta para que se le arrestase, si era nombrado en él daba parte de enfermo, si salía con licencia seguía la falta; así que como digo el corto tiempo que presta sus servicios, ha tenido más prisiones y partes de enfermo que servicio que ha prestado".<sup>9882</sup> (AGE, Leg.8636)

<sup>9883</sup> Declaraciones testimoniales hechas ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, el 7 de Octubre declara el Tte. Cnel. Federico López, el 16 de octubre de 1891 los oficiales del regimiento: Abogado, Tassi, Paz y Redruello, y el 20 de Octubre el Gral. de Brigada Napoleón Uriburu. Sorprendentemente, los Alféresces Demetrio Márquez y José M. Muñoz no fueron convocados a declarar por el Fiscal Carpi.

<sup>9884</sup> AGE, Leg.23, fs.4.

<sup>9885</sup> AGE, Leg.23, fs.4.

<sup>9886</sup> AGE, Leg.23, fs.4.

<sup>9887</sup> AGE, Leg.23, fs.4v.

<sup>9888</sup> AGE, Leg.23, fs.4v.

<sup>9889</sup> AGE, Leg.23, fs.4v y 5.

- 
- <sup>9890</sup> Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en el Apéndice B-XXV.-
- <sup>9891</sup> Bloch, 2003, 110.
- <sup>9892</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>9893</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>9894</sup> AGE, Leg.23, fs.5.
- <sup>9895</sup> AGE, Leg.23, fs.5. Los deberes que tienen los Comandantes de destacamentos hacia los Jefes de Cuerpo son: "...darle cuenta semanalmente de las novedades ocurridas durante este tiempo, la instrucción dada a la tropa, el rancho suministrado, procurando siempre ajustarse al régimen y racionamiento del Cuerpo, y si ha sido necesario alguna alteración, también darle cuenta dando las razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta inmediatamente de los urgentes. El deber que tiene un Comandante de destacamento para con un superior militar bajo cuyas órdenes está el destacamento, es darle cuenta diariamente de las novedades ocurridas y de las disposiciones que haya tomado en bien del servicio y de las necesidades del destacamento" (reproducido íntegro en el Apéndice H-V).
- <sup>9896</sup> AGE, Leg.23, fs.5.; y Apéndice H-V.
- <sup>9897</sup> Nellar, 1972, II, capítulo LVIII.
- <sup>9898</sup> Breve Introducción a la Historia del Derecho Penal Militar Argentino, en Igounet (h) e Igounet, Código de Justicia Militar (Librería del Jurista), pp.XXVII-XXIX. Sobre las Ordenanzas Reales de Carlos III, ver Millán Garrido, 1993. Sobre dichas Ordenanzas en Argentina, ver Ramírez, 1987, 253.
- <sup>9899</sup> Groussac, 1972, 143.
- <sup>9900</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.
- <sup>9901</sup> Los cuatro últimos mencionados: Tassi, Redruello, Márquez y Perón pertenecieron a la Promoción 16<sup>a</sup>. del Colegio Militar, la misma a la cual perteneció el entonces cadete Juan J. Comas, involucrado en 1906 en un crimen pasional, donde mató al Capitán Arturo Macedo e intentó luego suicidarse. La foja de servicio de Alberto Perón consta sólo de tres fojas que impiden conocer el motivo de su muerte. Márquez tuvo un transcurso fugaz por el Colegio Militar como Aspirante agregado del Regimiento 1° de Artillería, pero fue dado de baja de su cuerpo donde revistaba y era ajustado.
- <sup>9902</sup> En la Promoción 16<sup>a</sup>, Tassi alcanzó en el Orden de Mérito el 37° lugar entre 56 egresados, Márquez el 43°, Perón el 46°, y Redruello el 52° (Figueroa, 2001, 115, 136, 142 y 161). En dicha Promoción se alcanzaron a graduar 26 artilleros, de los cuales solo media docena alcanzó el grado de general (Ledesma, Solá, Lagos, Abogadro, Badaro y Maglione). Alberto Perón era hijo del médico Tomás Perón y tío de Juan Domingo Perón (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). Entre otros notorios oficiales, que pertenecieron a la misma Promoción en que se graduaron el Mayor Comas y los Tenientes Tassi, Márquez, Redruello y Perón estuvieron Froylán Leyría, Enrique Avogadro (hermano menor de José M. Abogadro, quien para diferenciarse de su hermano se había alterado el apellido incluyendo una v corta), los Revolucionarios de 1905 Isidro Arroyo,

---

Ricardo Pereyra Rozas y el Mayor Emilio de Ipola, y los hermanos Spika, ya sea Augusto que llegó a Coronel, como Carlos que llegó a Mayor.

<sup>9903</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9904</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9905</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9906</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9907</sup> AGE, Leg.23, fs.11. El Sargento Quiroga era egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos.

<sup>9908</sup> Sobre la bailanta como forma de explotación en el Chaco, ver Bitlloch y Sormani, 1997.

<sup>9909</sup> El Cap. Abogadro era para entonces soltero. Asimismo, Abogadro padecía de sífilis, y para su larga y costosa terapia con sales de mercurio debía viajar periódicamente a Buenos Aires.

<sup>9910</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9911</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9912</sup> AGE, Leg.23, fs.5v.

<sup>9913</sup> AGE, Leg.23, fs.5v., 8, 10 y 23v..

<sup>9914</sup> AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14.

<sup>9915</sup> AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14.

<sup>9916</sup> AGE, Leg.23, fs.20v..

<sup>9917</sup> AGE, Leg.23, fs.6 y 15v.

<sup>9918</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..

<sup>9919</sup> Bloch, 2003, 104.

<sup>9920</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.

<sup>9921</sup> De seguro esta no fue la primera vez que Uriburu aplicaba la última pena, pues esta era usual en la IV División que comandó durante la Campaña del Desierto, y en la Jefatura de la Frontera de Salta.

<sup>9922</sup> AGE, Leg.23, fs.6.

<sup>9923</sup> AGE, Leg.23, fs.6.

<sup>9924</sup> AGE, Leg.23, fs. 9.

<sup>9925</sup> Probablemente el diario **Los Pueblos de Misiones**, publicado por el aguerrido político liberal y luego radical Coronel Angel Blanco, entre 1890 y 1892, traiga alguna referencia.

<sup>9926</sup> Cuadra aún consultar los diarios de Asunción, que por estar río de por medio, muy bien podrían haber reflejado dicha noticia.

---

<sup>9927</sup> Debo esta reflexión al Teniente de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

<sup>9928</sup> Sesión n.61 de la Cámara de Senadores de la Nación.

<sup>9929</sup> ver Herrera, 1930, 55.

<sup>9930</sup> ver Mendía, 1892, 137 y 147.

<sup>9931</sup> Prado, 1934, capítulos XIII y XIV; Daza, 1975, 49-52; y Fotheringham, 1998, 195. Miranda (1955) describe un Consejo de Guerra verbal incoado al cacique Yaloschi, en el Chaco (Miranda, 1955, 105; y Viñas, 1982, 321). Excepcionalmente, y sólo por ser cacique, por haber caído prisionero y para vengarse por haber atentado contra el Comandante Fontana, se le formó Consejo de Guerra. Según el General Gelly y Obes en la Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, el Comandante Olascoaga fue relevado de la frontera "...para someterlo a un Consejo de Guerra por el fusilamiento inautorizado de un individuo y cometió el crimen de sublevarse con la fuerza que mandaba" (MMGyM, 1865, XVI). Según *La Vanguardia*, "...las damas [de alta sociedad] son hermanas de las que no tuvieron una palabra de piedad para el soldado Frías, que sufrió el suplicio de la "capilla" y fue ultimado por las descargas del piquete de fusilamiento, sin que nadie intentara tocar en su favor el corazón del presidente" (*La Vanguardia*, miércoles 4-XI-1908, reproducido íntegro en el Apéndice J-III). En 1869, el coronel Julio Campos escribe a Francisco Borges desde Pillahuinco "...Ayer, momentos antes de la Lista de la tarde, me fue denunciada por un trompa de caballería de línea una sublevación que debía tener lugar al toque de silencio, en la cual estaban implicados todos los extranjeros. Inmediatamente procedí a la averiguación, los puse en Consejo de Guerra verbal, y hoy a las 7 de la mañana de seis condenados a muerte se fusilaron dos, un cabo y un soldado, los dos prusianos" (Rodríguez, 1964, 27). En 1877 se substanció un Tribunal de Honor contra los Alféreces Edmundo Dale y Américo Álvarez, por haberse extralimitado en la defensa de los soldados Eulogio Esquivel, Antonio Gaitán y Juan Ríos, del Regimiento 2 de Caballería de Línea, procesados y condenados a muerte por desertión por ante un Consejo de Guerra Ordinario, con graves cargos contra la administración del Ejército y la División a cargo del General Marcelino Freyre (AGE, Leg.527, fs.1). Este sumario ha desaparecido tanto del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como del Archivo General del Ejército. El Coronel Francisco Borges, abuelo paterno de Jorge Luis Borges, firma en Noviembre de 1873, desde un Campamento en marcha, que "...el General en Jefe ha dispuesto que los soldados Francisco González y Pedro Barreto Núñez, pertenecientes a la Brigada Villaguay del Ejército Nacional, sean pasados por las armas, a las dos de la tarde de este día", por haber cometido crímenes, violencias y robos en el pueblo de San José de Feliciano (aprehendidos por los vecinos extranjeros César Franqui, Conrado Combis, Francisco Cámaras, Gabriel Garcés, Mariano Elóizaga, y Enrique Sampay, abuelo este último del constitucionalista peronista argentino homónimo), "...poniéndose en conocimiento del Ejército que todo crimen de esta naturaleza será castigado con igual pena, sin más trámite que la justificación del hecho" (AGE, Leg.50, fs.52-53, expediente suelto hallado en una Foja de servicio correspondiente a un oficial de dicha Brigada del Ejército Oriental que luego participó en el Ejército Argentino). El expediente correspondiente a este Tribunal de Honor no lo he podido hallar aún. Los fusilamientos ordenados en 1893 por el general Bosch en La Plata merecen la completa sanción del gabinete y al causante de los atropellos se le recompensa con la jefatura de las fuerzas de la Capital Federal. (P. R., 1913, 225-230; *El Municipio*, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1, reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-III; e Intervención de Buenos Aires, *La Prensa*, 16-VIII-1893, p.3, col.6-7 ).

<sup>9932</sup> El fusilamiento del Capitán Eloy Brignardello en julio de 1890 no puede haberse efectuado, a juicio de *El Municipio* (Rosario), "...de ninguna manera, porque de un acto tal quedan algunos antecedentes y también por lo que presenta una sola herida y está situada en la parte ya dicha y no en el pecho o al menos en el cuerpo. Entonces es aceptable, que el heroico joven, antes de traicionar su compromiso con los revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, resolvió faltar a los deberes de militar, y antes de recibir el castigo con que le amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su existencia". (El entierro del capitán Brignardello (*El Municipio*, martes 5 de agosto de 1890, p.1, col.7), reproducido en forma íntegra en el Apéndice J-IV).

<sup>9933</sup> LÓPEZ URRUTÍA, 2001, CAPÍTULO SEXTO.

<sup>9934</sup> Sobre el terror y sus secuelas, ver <http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter.html>

---

<sup>9935</sup> Abogado pertenecía a la Promoción 12<sup>a</sup>, la misma de Elías Paz, y había alcanzado en el Orden de Mérito el 46° lugar (Figueroa, 2001, 39). En su Promoción se habían graduado una quincena de artilleros, destacándose entre ellos los Generales Andrés Rodríguez, Eduardo Raybaud y Francisco Zerda, y el revolucionario Coronel Publio Risso Patrón.

<sup>9936</sup> Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 2005.

<sup>9937</sup> ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio Moyano Gacitúa, el Comandante de un Distrito Militar "...no puede suspender el auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo .....do de la misma dice: "Hay una clara distinción entre la suspensión del writ of habeas corpus en el sentido de la Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la suspensión ipso facto que ocurre en todas partes donde rige la ley Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la guerra, i existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las necesidades de la guerra. Su aplicación solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del empleado son lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades civiles i a casos surgiendo dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la Ley Marcial. Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de toda forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de traba a este poder discrecional a que aspira", i que se refleja en la actitud del oficial en cuestión; no obstante ello, la persona de los miembros del ejército i aun cuando están desempeñando funciones de sus superiores, no están fuera del alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que no sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por delitos comunes; siendo también simples particulares respecto a la jurisdicción disciplinaria de los jueces cuando no estén amparados sus actos por la ordenanza militar i observan el respeto debido a las autoridades". (Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Corrección Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, reproducido en Apéndice J-II). Moyano Gacitúa era el autor de un escrito titulado "La pena de penitenciaría y el proyecto de Código Penal", publicado en 1895; y del "Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino", publicado en 1899.

<sup>9938</sup> AGE, Leg.23, fs.1.

<sup>9939</sup> AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v.

<sup>9940</sup> AGE, Leg.23, fs.6v.

<sup>9941</sup> AGE, Leg.23, fs.6v.. El Coronel Tassi fue el padre de la célebre atleta Olga Tassi y del General de Brigada Raúl Tassi.

<sup>9942</sup> AGE, Leg.23, fs.7.

<sup>9943</sup> AGE, Leg.23, fs.7.

<sup>9944</sup> AGE, Leg.23, fs. 9.

<sup>9945</sup> AGE, Leg.23, fs. 9.

<sup>9946</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.

<sup>9947</sup> Los sucesos de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, en 1891, reproducidos enteros en los Apéndices D-III al D-VIII.

<sup>9948</sup> ver Nunn, 1975; y Quiroga y Maldonado, 1988. Sobre el modelo

---

prusiano, ver Rosas Berardi, 1998. Sobre el modelo napoleónico, ver Woloch, 1986.

<sup>9949</sup> AGE, Leg.23, fs.13v. y 21.

<sup>9950</sup> AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v.

<sup>9951</sup> AGE, Leg.23, fs.6v..

<sup>9952</sup> AGE, Leg.23, fs.6v..

<sup>9953</sup> Era hijo del Coronel Elías Paz López y de Clara Rodríguez, y sobrino político de Luciano y Pastor Gorostiaga. Su padre era primo hermano del ex Presidente Julio A. Roca. Llama la atención que en el legajo del padre, su madre Clara Rodríguez hace una declaración donde no lo menciona en absoluto. Elías Paz perteneció a la Promoción 12ª del Colegio Militar, la misma en la cual estaba el entonces cadete Manuel Maciel, involucrado en un sumario por conato de sodomía. Sobre la conducta de Elías Paz durante su paso por el Colegio Militar, ver Apéndices A-IV y J-I.

<sup>9954</sup> AGE, Leg.23, fs.15v..

<sup>9955</sup> AGE, Leg.23, fs.15v..

<sup>9956</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..

<sup>9957</sup> AGE, Leg.23, fs.21v..

<sup>9958</sup> AGE, Leg.23, fs.21v.

<sup>9959</sup> AGE, Leg.23, fs.24.

<sup>9960</sup> AGE, Leg.23, fs. 12v.

<sup>9961</sup> AGE, Leg.4536.

<sup>9962</sup> AGE, Leg.23, fs.10, 10v., y 11v.

<sup>9963</sup> AGE, Leg.23, fs.11v.

<sup>9964</sup> AGE, Leg.23, fs.19v..

<sup>9965</sup> Los sucesos de Corrientes, **Sud América**, miércoles 22-VII-1891, reproducido entero en el Apéndice D-XI.

<sup>9966</sup> AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu

<sup>9967</sup> AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón Uriburu

<sup>9968</sup> AGE, Leg.4536.

<sup>9969</sup> García Enciso, 1970, 237.

<sup>9970</sup> AGE, Leg.3939. Saturnino E. García, como jefe de la 7a. División de Ejército, con sede en Salta, había participado en la represión de la Revolución de 1905 (Etchepareborda, 1968, 281).

- 
- <sup>9971</sup> AGE, Leg.1683, fs.93.
- <sup>9972</sup> Para conocer su actuación represiva en el mundo de los pueblos originarios, ver Apéndice B-XIII.
- <sup>9973</sup> Figueroa, 2001, 133.
- <sup>9974</sup> AGE, Leg.8636.
- <sup>9975</sup> Figueroa, 2001, 142.
- <sup>9976</sup> Figueroa, 2001, 136.
- <sup>9977</sup> El legajo 10.012, correspondiente al Alférez Alberto Perón fue extrañamente expurgado, pues solo consta de tres escasos folios, en los cuáles sólo se deja ver su condición de deudor contumaz. Cutolo lo da fallecido diez años después, en 1906 (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14).
- <sup>9978</sup> AGE, Leg.10.012.
- <sup>9979</sup> Ortiz, 2005, 50.
- <sup>9980</sup> Debo esta reflexión a mi colega y amigo Guillermo Wilde.
- <sup>9981</sup> Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (*La Tribuna-Paraná*, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-III.
- <sup>9982</sup> Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (*La Tribuna-Paraná*, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-III.
- <sup>9983</sup> No confundir con el Coronel Carlos Domingo Sarmiento, el que mató en duelo a Lucio V. López. José María Uriburu seguramente estaba al tanto de los debates celebrados en la Sociedad Geográfica Argentina acerca del rol del indio del Chaco (1881-1890), donde participó activamente y llegó a publicar sesudos escritos el geógrafo y naturalista alemán Federico Host, quien había acompañado al Coronel Napoleón Uriburu. Sobre estos cruciales debates, ver Lois y Troncoso, 1998; y sobre Host, ver la biografía redactada en el Diccionario de Cutolo..
- <sup>9984</sup> Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. José María Uriburu había operado en el Chaco con anterioridad, en 1887 y 1888 (Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [MMGyM], 1887, 318-362; y 1888-89, 229-258).
- <sup>9985</sup> Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I.
- <sup>9986</sup> Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I.
- <sup>9987</sup> Meli, 1968, 331 y 332.
- <sup>9988</sup> Instrucciones que lleva el Teniente José C. Irurueta, Formosa, 14 de Octubre de 1901 (AGE, Leg.6271), reproducidas en Apéndice K-I. Sobre el rol de los intérpretes, ver Claval, 1999, 92.
- <sup>9989</sup> Teófilo O'Donnell, Coronel-Inspector de Caballería, a S.E. el Ministro de Guerra, Capital Federal, 11-IX-1906 (AGE-Leg.1840, reproducida en Apéndice K-II). Sobre la cruda y violenta experiencia de O'Donnell en el Regimiento 11 de Caballería durante las campañas de la frontera sur, ver Figuerero, 1945, 399-403. El Coronel Teófilo O'Donnell venía de ser Agregado Militar en Italia. Contrajo matrimonio en 1898 con Sofia Palma, hija de José Palma y Juana Ferreira. Fallece en Francia en 1939. Teófilo alude que en su niñez, poco después de Caseros, mucho le debe a un

---

pariente de su familia, el General Evergisto de Vergara. Para su biografía institucional, ver Yaben, 1939, IV, 194-197. Entró al ejército a los 13 años de edad, y participó conjuntamente con su hermano mayor Carlos en la represión de la Revolución del 90.

<sup>9990</sup> “...El estado de flacura del ganado mantenido a potreros de los Regimientos 2 y 7 es verdaderamente lastimoso, anémico y a mi juicio refleja una de las época más decadentes de la Caballería Argentina, la más pequeña jornada consumiría sus fuerzas. Los Jefes de estos Cuerpos atribuyen al mal estado de los campos en que pastan y en general a que ha sido difícil encontrarlos mejor en la Región, por la estación y seca. Los caballos del 5 y 6 aunque en condiciones medianas de gordura, es en su mayoría ganado viejo de escasa alzada y en su totalidad revelan exceso de fatiga que los inhabilita para el servicio de Regimiento de tropas regulares. Es así que en estas unidades falta la animación y vida que debe reinar en los cuerpos montados y que el desaliento se refleja en los Jefes y Cuadros de Oficiales cuya existencia monótona e inerte sin los grandes estímulos del trabajo activo los conduce poco a poco a perder el sentimiento del arma y su espíritu de empresa, condiciones indispensables para la existencia brillante de una Caballería audaz y emprendedora. (Teófilo O'Donnell, Coronel-Inspector de Caballería, a S.E. el Ministro de Guerra, Capital Federal, 11-IX-1906 [AGE-Leg.1840 y 4001], reproducida en Apéndice K-II).-

<sup>9991</sup> Nellar, 1972, II, 351.

<sup>9992</sup> Cutolo, 2004, 26.

<sup>9993</sup> ver Lyautay, 1891, 1900. Las estrategias del General Lyautay, conocidas como las del “manchón de aceite”, fueron tomadas de los generales Thomas Robert Bugeaud y Joseph Galliéni, quienes se destacaron en la colonización de Argelia, Madagascar, Indochina y Marruecos (Ringel, 1903 y Confer, 1939, citados en Gottmann, 1968, 171, 174, 175, 186 y 202). A su vez, Bugeaud había aprendido de sus lecturas sobre el General Skobelev y la conquista rusa del Cáucaso (Gottmann, 1968, 187). Sobre la conquista rusa del Cáucaso, ver Becker, 1878; y Morgan, 1994. Sin embargo, la presencia de armas logísticas para construir fortificaciones, canales, caminos y murallas en las propias legiones romanas, nos indicarían que el General ruso Skobelev no habría inventado nada, y que mucho de lo que impartió habría sido tomado de Belisario y los generales bizantinos (Sobre las armas logísticas en las legiones romanas, ver Luttwak, 1976, citado en Mann, I, 395).

<sup>9994</sup> Si bien O'Donnell tenía el apoyo de la gran prensa capitalina constituida por **La Nación** y **La Prensa**, así como por la prensa del interior (**El Tribuno** de Paraná y **El Día** de Santa Fe) y de las colectividades extranjeras, tales como el **Buenos Aires Herald** y **Le Courier de La Plata**, sobrellevaba también la crítica acerva de periódicos como **El Diario**, el cual le guardaba rencor por su participación personal en la protesta militar contra dicho periódico, en la polémica a propósito de la creación de la Escuela Superior de Guerra en abril de 1900. En cuanto a la prensa anarco-socialista, como **La Vanguardia** y **La Protesta**, lo ignoraron olímpicamente.

<sup>9995</sup> Allaría egresó en 1890 de la Real Escuela Superior de Guerra de Turín (Picciuolo, 2000, 87). Sobre Rufino Ortega, ver Ramírez, 1987, 137.

<sup>9996</sup> “Tengo el honor de poner en conocimiento de Vd. que hoy he ordenado al Capitan Enrique Rostagno que presta sus servicios en ese Estado Mayor, que se constituya en arresto y a disposición de V.S. en el Batallón 10 de Infantería acampado en Santa Catalina por haber dirigido en asuntos del servicio comunicaciones descomedidas e irrespetuosas al que firma y al Subdirector del Colegio. (Carlos E. O'Donnell al Jefe del Estado Mayor General, San Martín, 9-X-

---

1895-AGCMN-LCN-No.17-folio 19). Ignoro si es este el arresto que menciona la viuda del Coronel en su libro (Rostagno, 1966, 50-51).

- <sup>9997</sup> Sobre las Instrucciones generales a que deberá sujetarse el Sr. Jefe de la División de Caballería del Chaco Coronel Teófilo O'Donnell, Paraná Septiembre 12 de 1907, ver Apéndice K-VI.
- <sup>9998</sup> Para una crítica del Proyecto de línea de fortines, ideado por el S. General D. José María Uriburu, ver Apéndice K-III.
- <sup>9999</sup> Sobre la ubicación de Puestos y la entrevista del Coronel Teófilo O'Donnell con diferentes caciques, ver Apéndice K-IV. El Coronel O'Donnell manifiesta que "...cerca de 1500 indios Tobas y Maticos que componían seis tribus con sus prestigiosos caciques presentáronse a mi subida por el Teuco en cuyas márgenes habían establecido sus tolderías y se dedicaban a la pesca, estas tribus que viven en una pobreza indigente solo esperan la protección del Exmo. Gobierno Nacional para someterse definitivamente a la vida civilizada y dedicarse a cultivo de la tierra que les proporcione tranquilidad y bien estar", reproducido completo en el Apéndice B-XXIII.
- <sup>10000</sup> Sobre el ataque de indios maticos y la muerte del Teniente José L. Brown, ver Apéndice B-XXIV.
- <sup>10001</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10002</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10003</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10004</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10005</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10006</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10007</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10008</sup> Crowder, 1967. Por analogía, podría figurar como antecedente que en la provincia de Buenos Aires, en 1872, fueron sorteados a soldados y oficiales una enorme cantidad de lotes en el pueblo de Guardia Nacional, actual Chacabuco (Círculo Militar, II, 98-99). Asimismo, en el año 1855, el Coronel Silvino Olivieri y el Mayor de Ingenieros Felipe Caronti, tuvieron conocimiento que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se imponía la formación de colonias agrícolas-militares. Con ese motivo integraron una legión de 150 hombres, con labradores y soldados, todos veteranos del sitio de Montevideo y de la defensa de Buenos Aires. Los que se embarcaron rumbo a Bahía Blanca, con la doble misión de fomentar la agricultura y oponer una valla a las continuas depredaciones de los indios, y después de realizar varias expediciones, con la finalidad de reconocer el terreno, se establecen muy cerca de la orilla del río Sauce Chico, donde fundan "Nueva Roma", el 1º de julio de 1856.
- <sup>10009</sup> ver Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducido en Apéndice K-V.

- 
- <sup>10010</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10011</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10012</sup> Coronel Teófilo O'Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: AGE, Leg.9128) reproducida en Apéndice K-IV.
- <sup>10013</sup> Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducida en Apéndice K-V
- <sup>10014</sup> Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, Leg.9128), reproducida en Apéndice K-V
- <sup>10015</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Urriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I.
- <sup>10016</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Urriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I.
- <sup>10017</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Teniente Coronel Napoleón Urriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I.
- <sup>10018</sup> La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobies-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de pobladores-La Expedición O'Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (*El Diario*-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI.
- <sup>10019</sup> La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobies-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de pobladores-La Expedición O'Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (*El Diario*-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI.
- <sup>10020</sup> La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobies-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de pobladores-La Expedición O'Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (*El Diario*-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI.
- <sup>10021</sup> La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobies-Picadas y Caminos Carreteros-Inmigración de pobladores-La Expedición O'Donnell-Necesidad de distribución de tierras-Obra de civilización (*El Diario*-29-XII-1908), reproducido en el Apéndice K-XXXVI.
- <sup>10022</sup> Punzi, 1997, 705. El Capitán Baldomero Alvarez debe ser hijo o sobrino del Coronel Baldomero Alvarez, quien conjuntamente con el General Manuel J. Campos se alzó en armas en 1893 en la Provincia de Buenos Aires.
- <sup>10023</sup> La Ocupación del Chaco-II-De Urquiza a Formosa-El Problema de los Indios, por Baldomero Álvarez (*La Nación*-22-XI-1908), reproducido en el Apéndice K-XVI. Sobre la Misión Franciscana Nueva Pompeya (Chaco), ver Giordano, 2005, 59-67.
- <sup>10024</sup> La Ocupación del Chaco-II-De Urquiza a Formosa-El Problema de los Indios, por Baldomero Álvarez (*La Nación*-22-XI-1908), reproducido en el Apéndice K-XXII.-
- <sup>10025</sup> Los bandoleros del Chaco-Nuestra Doctrina (*El Diario*-2 o 3 de Diciembre de 1908), reproducido en el Apéndice K-XXX.-
- <sup>10026</sup> Los bandoleros del Chaco-Nuestra Doctrina (*El Diario*-2 o 3 de Diciembre de 1908), reproducido en el Apéndice K-XXX.-
- <sup>10027</sup> Los bandoleros del Chaco (*El Diario*-21-IX-1908), reproducido en el Apéndice K-XIV.

- 
- <sup>10028</sup> Los bandoleros del Chaco (*El Diario*-21-IX-1908), reproducido en el Apéndice K-XIV.
- <sup>10029</sup> El bandolerismo en el Chaco y Formosa (*El Diario*-24-X-1908), reproducido en el Apéndice K-XIX.
- <sup>10030</sup> Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto Concepto Militar (*La Tribuna-Paraná*, VIII-1908), reproducido en el Apéndice K-IX.
- <sup>10031</sup> Ver Ryan, 2005, 264. Territorios Nacionales-Chaco-Los bueyes robados-Apresados y devueltos a sus dueños-Los alarmistas y el bandillaje de la frontera (*El Diario*-5-XII-1908), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XXXV.
- <sup>10032</sup> La colonización del Chaco (*La Nación*-4-I-1909), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XL.
- <sup>10033</sup> Comandante de la Frontera del Chaco Coronel Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra Coronel Martín de Gainza, Salta, Febrero 6 de 1873), reproducido completo en el Apéndice B-I.
- <sup>10034</sup> El Chaco Argentino-Clima, riquezas y necesidades-La navegación del Pilcomayo (*La Prensa*-12-XI-1908), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XXIII.
- <sup>10035</sup> Chaco Austral-Fuerzas Militares sin Racionamiento-Desarrollo de la colonización (*La Prensa*-19-X-1908), reproducido íntegramente en el Apéndice K-XVIII.
- <sup>10036</sup> <http://www.chaco.gov.ar/cultura/leopoldo%20marechal/marechal1.htm>
- <sup>10037</sup> <http://www.chaco.gov.ar/cultura/leopoldo%20marechal/marechal1.htm>
- <sup>10038</sup> Sobre la autonomía del poder militar en un orden burocrático-pretoriano, ver Mann, 1997, II, capítulo 12.
- <sup>10039</sup> Para la práctica de fundar y renovar instituciones, ver Sánchez-Parga, 2005, 443-448. Sobre la relación entre política y estrategia militar en la guerra y la paz, ver Craig, 1968b, II, 222, 242 y 257; y Possony, 1968, 129.
- <sup>10040</sup> Para las unidades de infantería y de artillería pesada (carros) en el ejército del faraón, ver Schulman, 1964, citado en Kuhrt, 2000, 251. Para la combinación de hoplitas, arqueros, honderos y carros de guerra en el combate de la antigua Grecia, ver Vidal-Naquet, 2004, 54-55. Sobre la formación de la falange hoplita, implícita en el modelo de la polis o ciudad-estado, ver Snodgrass, 1965, 110-22, citado en Mann, 1997, I, 290. Sobre las armas logísticas en las legiones, para construir fortificaciones, canales, caminos y murallas, ver Watson, 1969; Webster, 1979; y Luttwak, 1976, citado en Mann, I, 393 y 395. Sobre la defensa estática y la germanización de las legiones como causa de la caída del Imperio Romano, ver Ferrill, 1989. Y sobre la legión romana como modelo de las reformas militares de Mauricio de Nassau, ver Gilbert, 1968, 58.
- <sup>10041</sup> Mann, 1997, II, 553 y 554. Para la superioridad de la infantería sobre la caballería y la artillería, y sobre las tres partes inseparables de un ejército tratadas en los capítulos principales del Libro Central de los Discursos de Maquiavelo, ver Strauss, 1964, 190 y 218; y Sánchez-Parga, 2005, 169. Para la proporción de la caballería sobre la infantería en la modernidad temprana, ver Guerlac, 1968, 73. Sobre la artillería en el orden de batalla de Federico el Grande, ver Palmer, 1968, 137. Sobre la invención de la artillería moderna (pólvora) en Maquiavelo, ver Gilbert, 1968, 46-47. Y en la guerra de la independencia norteamericana la proporción de la caballería y la artillería con respecto a la infantería se estableció en un máximo de uno a once (Kohn, 1975, nota 21, citado en Mahon, 1983).
- <sup>10042</sup> Para la flexibilidad en la composición del ejército en la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata con el Imperio de Brasil, ver Ocampo, 2003, 170 y 178.

---

<sup>10043</sup> Para la victoria del Paso de Humaitá en la guerra con el Paraguay de López, ver Doratioto, 2002, 304-311.

<sup>10044</sup> Sobre las estrategias de aniquilamiento o guerra absoluta y estrategias de agotamiento o guerra limitada en el pensamiento de Delbrück, ver Craig, 1968b, 239; y Possony, 1968, 137. Sobre la guerra limitada, ver Osgood, 1979.

<sup>10045</sup> En los círculos militares corría el rumor de que el ministro de la guerra "...proyecta la organización de tres divisiones tituladas del centro, del norte y del sur, para el estudio de las zonas comprendidas en esos puntos y para que practiquen ejercicios de campaña, evoluciones, marchas, levanten planos, y todo cuanto concierne a un ejército de operaciones. La del sur será formada, como plantel, por los regimientos 2, 3 y 9 de caballería, de guarnición en la línea militar del Río Negro, a los que se incorporarían cuerpos de las otras armas. La del centro, probablemente sería establecida en Córdoba, estaría formada bajo la base del 7º de infantería destacado en Río IV. La del norte, estaría representada como las anteriores por las tres armas, sirviendo de plantel el 1º de caballería" (*El Tiempo*, 30-X-1895)

<sup>10046</sup> De la *Revue Militaire de l'Etranger* el periódico *El Tiempo* toma las siguientes reglas de combate para la infantería rusa, dadas por el general Dragomirov comandante del 12º cuerpo de ejército: Durante las maniobras de Mejiojié, he notado, dice el comandante del 12º cuerpo, que casi todas las unidades incurrieron en un error muy grande: el asaltante empezaba el ataque decisivo sin haber hecho avanzar previamente a la reserva; resultando de ello un ataque poco enérgico y sin cohesión. Dispongo que se observen desde hoy las disposiciones siguientes: 1º Llegando a 700 u 800 pasos del enemigo (esta distancia depende del terreno) la cadena hará alto y romperá el fuego. El asaltante debe aprovechar esta detención para reconocer la posición del enemigo y hacer el plan de ataque, preparar este ataque con el fuego de la artillería y de la infantería, reforzar la cadena, si es preciso, renovar su provisión de municiones, indicarles a las unidades una dirección bien definida, y en fin hacer avanzar las reservas y establecerlas en puntos convenientes. 2º Después de que se haya aumentado la densidad de la tropa de choque, se continuará avanzando hasta la última distancia de tiro (300 pasos, más o menos del enemigo), sea de una manera continua sin detenerse, sea por medio de avances sucesivos, de un abrigo a otro; cada vez que se detenga la cadena hará fuego. Si la cadena se detiene a causa de pérdidas considerables, se hacen avanzar hasta ella algunas fracciones de la reserva, a fin de que continúe su movimiento. Esta manera de reforzar debe practicarse en tiempo de paz. 3º Cuando la cadena llegue a 300 metros más o menos del enemigo, según, el terreno, la cadena hace alto y rompe un fuego rápido. Las reservas continúan avanzando; así que llegan a la cadena, esta marcha al asalto sin dejar de tirar: cadena y reservas marchan al paso redoblado. Después a 30 o 50 pasos del enemigo, se carga a la bayoneta. 4º A fin de disminuir las pérdidas, se pueden hacer adoptar diversas formaciones a la reserva, desplegada, en una fila, en dos con cincuenta pasos de distancia entre una y otra; en fila india en cada subdivisión. Cualquiera que sea la formación, las reservas deben poder maniobrar a la voz de mando. En la guerra, el fuego enemigo es el que impone cualquiera de estas formaciones; en tiempo de paz es preciso practicarlas a todas para conocerlas bien. Las propiedades del nuevo fusil harán aumentar aún las distancias entre las líneas de la reserva. 5º Los tiros de guerra de tiempos de paz, prueban que el soldado quema hasta 50 cartuchos en media hora, no hay por consiguiente, una reserva de municiones que pueda bastar para un combate prolongado. Para economizar los cartuchos antes de llegar a las distancias en que el tiro es eficaz, es preciso tirar poco, mientras el enemigo está a más de 800 pasos. A fin de dirigir el consumo de las municiones, el comandante de la cadena hace tirar sucesivamente por pelotón por sección o por escuadra; si se ofrecen blancos extensos, tales como artillería, o columnas de infantería se hace fuego por salvas (*El Tiempo*, 31-V-1895)

<sup>10047</sup> Ver Nellar, 1972, II, 389. En el pasado la redacción de *El Tiempo* se había ocupado del proyecto de reglamento para artillería de montaña, presentado al Estado Mayor general por el teniente coronel Plácido Obligado, y el cual fue pasado a Informe de la Inspección de Artillería, que al efecto nombró una comisión compuesta por el coronel Ruiz Moreno, Inspector del Arma, y los tenientes coroneles Eduardo Martínez y E. Oliveros Escola; previo estudio del proyecto, estos señores informaron favorablemente, aconsejando su adopción. Con el informe, el Estado Mayor lo elevó al Ministerio de la Guerra, que lo aprobó y lo pasó a consulta de la Junta Superior de Guerra; allí fue tenazmente impugnado por el general Reynolds, sin llegarse a un resultado definitivo y permaneciendo detenido más de un mes hace se dice que esperando la presentación de otro proyecto análogo encomendado a una comisión compuesta por el

---

mismo general Reynolds, los tenientes coroneles Martínez, Obligado y Aguirre y el mayor Mallo, pero en realidad por diversidad de opiniones respecto al informe a dictarse (*El Tiempo*, 29-III-1895)

<sup>10048</sup> *El Tiempo*, 6-VII-1895.

<sup>10049</sup> El programa general que está dividido en tres escuelas: Aspirantes a cabos: cabos y sargentos, comprende para los primeros: lectura, escritura, aritmética, ordenanza, táctica, leyes penales; para los segundos: ordenanza, táctica, geografía de la república, aritmética, leyes penales y procedimientos; para los terceros: Ordenanza-Procedimientos-Geometría-Topografía-Geografía de la América del Sur. El programa de pontoneros comprende: la táctica correspondiente.- Consideraciones generales sobre los ríos-Principios generales de instrucción y establecimientos de puertos militares-Cuerdas-Nudos-Uniones de maderas, etc., etc. El de zapadores: Ampliación de las nociones de geometría adquiridas en la escuela general del regimiento-Topografía- Piquetes, jalones, plomada, niveles, etc.-Representación del terreno, plano, escalas, signos convencionales para la representación del terreno, etc. Obras de campaña, elementos para la ejecución de las obras, movimiento de tierras, herramientas, trazado, perfiles, relieve, etc. El de ferrocarrileros: Breves nociones sobre los ferrocarriles, en uso y empleo, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del personal destinado al entretenimiento, conservación, vigilancia, y policía, guardabarreras, guardagujas, empleados de los trenes, servicio de la locomotora, etc. El de telegrafistas está dividido en tres partes: aspirantes a telegrafistas, telegrafistas de 2ª clase y telegrafistas de 1ª clase (*El Tiempo*, 6-VII-1895).

<sup>10050</sup> En 1898 fue elevado al Estado Mayor, quien ha dispuesto sea informado por la sección técnica, un proyecto de creación de unidades de soldados arrieros, redactado y presentado por el capitán de caballería Aroldo Malmstem, que presta actualmente sus servicios en el detall general del ejército (*El Diario*, 22-VIII-1898). En la cuestión de los campos de tiro, uno de los elementos principales "...son los soldados apuntadores cuya única misión es graduar el alza y colocar las pieza en situación de hacer con sus proyectiles el mayor número de blancos posible. El jefe del estado mayor en su último viaje al campamento de artillería de Villa Mercedes ha notado la escasez de esta clase de soldados y se ha propuesto conseguir el aumento de su número hasta el de 20 por cada batería cuando menos, valiéndose para ello de dos medios que indudablemente darán el resultado apetecido produciendo entre la tropa saludable emulación. Se aumentará en cinco pesos el sueldo del soldado apuntador y se le adjudicará una insignia especial que lo distinga del resto de la tropa. El rango de apuntador se obtendrá por concurso dentro del regimiento que pertenezcan los concursantes" (*El Diario*, 18 y 19-II-1896).

<sup>10051</sup> El general Capdevila anuncia, para fines de la semana de enero de 1896, una orden general en la que prohíbe absolutamente a los coroneles de regimiento ultrapasarse en sus deberes y derechos y estableciendo la libertad de acción de los comandantes (*El Tiempo*, 8-I-1896).

<sup>10052</sup> Los tenientes coroneles don Ricardo A. Day y don Augusto Maligne han presentado al ministro de la guerra, tres proyectos de reglamentos, para servicio interno, servicio de guarnición y servicio de campaña. Los dos primeros son la revisión de los reglamentos que fueron adoptados en 1890 y que por varios motivos como ser la renuncia del ministro que los aceptó y la revolución, no se han puesto en vigencia hasta la fecha (*El Tiempo*, 4-VII-1895).

<sup>10053</sup> *El Tiempo*, 4-IV-1895. Sobre la antropologización de la teoría militar, ver Caldwell, 1896, 1996.

<sup>10054</sup> Las últimas guerras habían demostrado la importancia del empleo del arma de caballería en grandes masas durante el período estratégico de las operaciones, "...sea efectuando el servicio de exploración a vanguardia o a los flancos de los ejércitos, sea efectuando excursiones a retaguardia del frente de operaciones del enemigo para cortarle de su base de operaciones, destruirle sus almacenes y apresar sus convoyes. Su empleo en masas, también se preconiza en los campos de batalla, y a él deben, los alemanes la conservación de sus posiciones en Vionville-Mars-la Tour: y los austriacos la salvación de su ejército batido en Sadowa y su victoria de Custozza en otra parte del teatro de la guerra, en la misma campaña [1866]. En la guerra de secesión norteamericana las masas de 2500 y 3000 jinetes obtuvieron resultados sorprendentes y el espíritu de empresa de los generales de la caballería americana despertó el espíritu de iniciativa del arma, en los ejércitos europeos" (*El Tiempo*, 20-VIII-1895).

- 
- 10055 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10056 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10057 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10058 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10059 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10060 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10061 *El Tiempo*, 4-IV-1895.
- 10062 Tito Livio en la ultima sección del Libro Segundo de sus Discursos alude al poder discrecional otorgado por el Senado a los capitanes de los ejércitos, ver Strauss, 1964, 126.
- 10063 La medida ha producido gran disgusto entre los comandantes de los cuerpos de línea y con motivo de una protesta que estos hicieron, han estado presos varios de ellos cuatro o cinco días por orden del general Capdevila. Sabemos que se ha tratado entre estos jefes de elevar su renuncia colectiva, por cuanto consideran arbitraria y fuera de lugar esa medida” (*El Tiempo*, 4-I-1896).
- 10064 Nellar, 1972, II, 519-520. Sobre la necesidad de comando unificado, ver Craig, 1968b.
- 10065 *El Diario*, 30-III-1896.
- 10066 ver Holborn, 1968, 46.
- 10067 *El Diario*, 30-III-1896.
- 10068 *El Diario*, 30-III-1896.
- 10069 *El Tiempo*, 9-X-1895.
- 10070 *El Tiempo*, 9-X-1895.
- 10071 *El Diario*, 2/4-IV-1896.
- 10072 *El Diario*, 2/4-IV-1896.
- 10073 La paz armada (*El Municipio*, 17-X-1895).
- 10074 La paz armada (*El Municipio*, 17-X-1895).
- 10075 La paz armada (*El Municipio*, 17-X-1895).
- 10076 La reorganización del ejército (*El Municipio*-10-IX-1891-p.1-col.1), reproducido en forma íntegra en el Apéndice H-VII.
- 10077 La ametralladora Maxim que vino a reemplazar a la vieja ametralladora Gatling, era “...un cañón de fusil Mauser, encerrado dentro de un tubo de bronce, el cual se llena de agua, de aceite, etc., a fin de disminuir el recalentamiento que produce la intensidad de su fuego, cuya rapidez puede alcanzar hasta 400 tiros por minuto. Estos aparatos, que para nuestra caballería se mandaron construir de manera que puedan utilizar los cartuchos del fusil de infantería, se transportan a lomo de caballo no pesando, cada uno, incluso el trípode, mas de 90 kilos. Se tarda en ponerlos en posición alrededor de tres minutos, y basta un golpe dado con la culata de una carabina para inutilizarlos” (*El Diario*, 1-VI-1896). Para mayor información sobre esta ametralladora, ver Nellar, 1972, II, 413-14.

---

<sup>10078</sup> En lo relativo a la fabricación de material de combate en el puerto austriaco de Fiume, se encargó el mayor Adolfo Díaz, y en cuanto a la inspección de los cascos en los talleres de Yarrow, en Polar, cerca de Londres, se hará cargo el capitán Jorge Victorica, ascendido a mayor antes de su partida, y ayudado por el mecánico que está a las ordenes de nuestra legación en Inglaterra (*El Tiempo*, 11-V-1895). La redacción de *El Diario* informa que en la semana entrante "...debe remitir el arsenal de guerra al campamento de Mercedes el nuevo armamento portátil para las tropas de artillería consistente en revolvers norteamericanos [Colt] y machetes de fabricación alemana" (*El Diario*, 29-II-1896).

<sup>10079</sup> De la *Revue D'Artillerie*, la redacción de *El Tiempo* toma los siguientes datos sobre las experiencias efectuadas en los Estados Unidos para la elección de un fusil para la marina: La comisión de experiencias nombrada a principios de 1894 para dictaminar sobre el modelo del nuevo fusil para la marina, ha diferido sus sesiones, sin haber elegido ninguna de las 12 armas examinadas; 5 de esas armas fueron suministradas por la compañía Remington; las otras eran de los modelos siguientes: Daudeteau (2 tipos), Lee, Briggs, Kneeland, Meiles, y Van Patten. Los resultados obtenidos son los siguientes: A consecuencia de las experiencias efectuadas en los polígonos de Indian Head [Maryland] que han demostrado las notables cualidades de resistencia de los cañones de níquel-acero, la oficina de l'Ordonnance de la marina, ha resuelto que el cañón del nuevo fusil, se haga con ese metal (los cañones suministrados por la compañía de Bethlehem, que fueron sometidos a experiencias, resistieron sin deteriorarse a 2000 disparos" (*El Tiempo*, 29-V-1895).

<sup>10080</sup> *La Revue D'Artillerie*, *Preussische Jahrbücher*, *La France Militaire*, *Revue Militaire de l'Etranger* *El Secolo* (Milan). *Le Courrier Francais* y *Nowoja Wremlya* (Moscú). La *Revue D'Artillerie* se editaba en París desde Oct. 1872 y operó hasta marzo de 1914. La *Preussische Jahrbücher* publicaba asiduamente los comentarios militares del historiador alemán Hans Delbrück (Craig, 1968b, 213 y 217). También se polemizaba sobre temas de tecnología militar entre los periódicos *La Nación*, *La Prensa*, *El Diario* y *El Tiempo*.

<sup>10081</sup> A propósito de los tipos de acero, que se habían iniciado por el inglés Henry Bessemer, sobre el nuevo metal llamado acero al boro el periódico *El Tiempo* toma de la *Revue D'Artillerie* los siguientes datos: "En la sesión de la Academia de Ciencias del 21 de enero último [1895], el señor [Henri] Moissan, en su nombre y en el del señor [Ulrich] Charpa, ha enviado una comunicación relativa a la preparación y a las propiedades de un nuevo producto, llamado acero al boro obtenido combinando el hierro con una pequeña proporción de boro. Las analogías que existen entre el carbono y el boro y su diferencia de volumen atómico hacen interesantes estas investigaciones, especialmente en lo que se relaciona con las teorías aceptadas actualmente sobre la constitución de los aceros. Este metal ha podido ser laminado en la forma de barra cilíndrica; se forja con facilidad al rojo oscuro, pero se vuelve quebradizo a los golpes del martillo si está demasiado caliente. En la generalidad de los casos, se trabaja de una manera análoga al acero dulce. Se han hecho con este metal, barras de dos milímetros, más o menos de grueso y se han templado en el agua después de haber sido calentadas a diferentes temperaturas. De estas barras se sacaron en seguida barretas de ensayo para la tracción, de 4 milímetros por 2 milímetros y de 90 milímetros de largo. Estas barretas han sido ensayadas sin experimentar ningún recocido.... En resumen, el boro, comunica al hierro la propiedad de tomar el temple, pero un temple especial correspondiente a una elevación de la carga de ruptura sin aumento sensible de la dureza. Su papel es, pues completamente distinto al del carbono" (*El Tiempo*, 29-IV-1895). A pesar de que otros químicos se envenenaron en el intento, en 1886 el francés Ferdinand-Frédéric-Henri Moissan pudo aislar el flúor a muy bajas temperaturas mediante el platino, y en 1893 había demostrado que el óxido de cromo puede reducirse por el carbón, al calor del horno eléctrico.

<sup>10082</sup> Referente al empleo de los morteros de campaña en el combate transcribimos la siguiente noticia publicada en la *Revue D'Artillerie*. En una conferencia, dada en diciembre último en el estado mayor del Círculo Militar de Moscú, sobre la acción de las masas de artillería, el general Tikhobrasov ha estudiado el empleo de los morteros de campaña en el combate. A falta de enseñanzas oficiales precisas, sobre el papel de estas piezas, es sumamente conveniente dar a conocer las simientes ideas emitidas por este oficial general: Del examen de los morteros de 6.10 resulta que en el campo de batalla estas piezas no deberán entrar en la composición de las masas de artillería en el período preliminar, ni durante la lucha de artillería. Para ello hay dos razones: ante todo, las baterías de morteros serán forzosamente inferiores a las baterías de cañones del adversario, bajo el punto de vista de la rapidez de la puntería y de la velocidad de

---

tiro; en segundo, lugar, en vista de resultados que puedan esperarse de las granadas de escaso peso, es poco lógico consumir municiones cuyo aprovisionamiento en razón de su mucho peso. Además, cuando llegue el momento de preparar el asalto, las baterías de cañones podrán encontrarse impotentes y será por consiguiente oportuno exigir de los morteros todo el poder que se necesite. El general Tikhobrasov deduce de estas consideraciones la manera como deben constituirse las masas de artillería. Al principio de la acción, deben componerse exclusivamente de baterías de cañones, los morteros quedan en la reserva general con la infantería (*El Tiempo*, 2-VIII-1895).

<sup>10083</sup> Nellar, 1972, II, 406, nota 36. Sobre el mecanismo del rayado de las piezas y un nuevo cañón inventado en Suecia la redacción de *El Tiempo* toma del periódico militar francés intitulado *La France Militaire* los siguientes datos: “Es por demás sabido que el rayado de las piezas es la operación más difícil y cara de la fabricación de los cañones. La diferencia de forma entre la superficie lateral del proyectil y la parte rayada del ánima da lugar a que los gases se escapen en derredor del proyectil y que a la larga produzcan deterioros en el interior del cañón. Este defecto se ha hecho mucho mas perceptible desde que han empezado a usarse en la artillería las nuevas pólvoras (*El Tiempo*, 1-V-1895)

<sup>10084</sup> Fuente: Talleres de Marina, *El Tiempo*, 11-V-1898

<sup>10085</sup> En estos días se firmará un contrato con la casa Krupp, para la construcción de torres blindadas giratorias, para la defensa de los boquetes de la cordillera (*El Diario*, 21 de octubre de 1896). Entre el material de ingenieros adquirido en Europa para nuestro ejército por el Tte. Cnel. Arturo Orzábal “...figuran dos puentes llamados de circunstancias. Estos puentes ligeros en su construcción, al par que sólidos, de fácil transporte, de gran utilidad en nuestro territorio, sobre todo en la parte fronteriza, donde la escasez de comunicaciones, en el caso desgraciado de una guerra, impedirá el rápido transporte de los pesados parques de ingenieros. Los puentes de circunstancias se arman sobre caballetes sistema Pfund, nombre del inventor, teniente coronel del ejército suizo, y que consiste en cuatro vigas pie, que se colocan dos a dos de cada lado, y de distancia en distancia, sostenidas por un eje metálico, y sobre las cuales se coloca los tranicos (sic) con la tablazón del piso del puente. Los puentes adquiridos para nuestro ejército han sido contruidos en los talleres del Creóoslo, y su resistencia es de 250 kilos por metro de superficie, permitiendo el paso de la infantería, dos a dos y de la caballería de uno a uno. Los puentes pueden armarse, con hombres expertos en esos trabajos, en 63 minutos. Cada puente es de 49 metros de largo [y un ancho de dos metros], y es transportado a lomo de 50 mulas, en trozos cuyo peso no excede de 100 kilos. Cada unidad de ingenieros lleva un puente” (*El Diario*, 16-VII-1896).

<sup>10086</sup> Sobre las construcciones militares durante el período 1884-1895 (Arsenal Naval de Zárate y Arsenal de Guerra), ver Martín, de Paula, y Gutiérrez, 1976, 297-299. Para una industria de guerra en Córdoba: la fábrica de pólvora, ver Lobos, 1984.

<sup>10087</sup> Sobre las comisiones de adquisiciones en Europa (Comisión de artillería, ingenieros militares y sanidad), ver Dufour y Ferrari de Capella, 1999.

<sup>10088</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895)

<sup>10089</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895)

<sup>10090</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895)

<sup>10091</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895)

<sup>10092</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.

- 
- <sup>10093</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10094</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10095</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10096</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10097</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10098</sup> Fuente: Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas, *El Tiempo*, 15 de enero de 1895), reproducido en forma íntegra en Apéndice L-V.
- <sup>10099</sup> Sobre la adquisición de elementos bélicos en Europa, ver Nellar, 1972, II, 406-414; y *Dufour y Ferrari de Capella, 1999*. En un folleto divulgado por el periódico *El Diario* se explica detalladamente "...el uso de los varios telémetros y de los anteojos micrométricos y de cañón, con sus teorías geométricas (*El Diario*, 28-IV-1896).
- <sup>10100</sup> Fuente: Contra el Teniente Coronel Sellstrom, *El Tiempo*, 1 de febrero de 1895
- <sup>10101</sup> Fuente: Contra el Teniente Coronel Sellstrom, *El Tiempo*, 1 de febrero de 1895
- <sup>10102</sup> Fuente: Contra el Teniente Coronel Sellstrom, *El Tiempo*, 1 de febrero de 1895
- <sup>10103</sup> Fuente: Contra el Teniente Coronel Sellstrom, *El Tiempo*, 1 de febrero de 1895. Para la industria de guerra británica, ver Trebilcock, 1973.
- <sup>10104</sup> Fuente: Contra el Teniente Coronel Sellstrom, *El Tiempo*, 1 de febrero de 1895
- <sup>10105</sup> La adquisición de armamento (*El Municipio*, 15-XI-1895).
- <sup>10106</sup> La adquisición de armamento (*El Municipio*, 15-XI-1895).
- <sup>10107</sup> La adquisición de armamento (*El Municipio*, 15-XI-1895).
- <sup>10108</sup> La adquisición de armamento (*El Municipio*, 15-XI-1895).
- <sup>10109</sup> La adquisición de armamento (*El Municipio*, 15-XI-1895).
- <sup>10110</sup> Nellar, 1972, II, 415.
- <sup>10111</sup> *El Tiempo*, 15-IV-1895. Sobre la Fábrica de Pólvora, ver Nellar, 1972, II, 414-417.
- <sup>10112</sup> Nellar, 1972, II, 415.
- <sup>10113</sup> *El Tiempo*, 15-IV-1895.
- <sup>10114</sup> *El Tiempo*, 15-IV-1895.
- <sup>10115</sup> *El Tiempo*, 15-IV-1895.

---

<sup>10116</sup> *El Tiempo*, 15-IV-1895. Después de varios pedidos, de numerosos informes y de gran pérdida de tiempo, se autorizó en abril de 1895 a la Fábrica Nacional de Pólvora "...a mandar construir las pesas de bronce necesarias para la reparación de las materias primas en la fabricación del producto. Hasta el presente esa operación se efectuaba sirviéndose de pedazos de fierro de lo que resultaban grandes diferencias en las cantidades de salitre, carbón o azufre que debían entrar en la composición, siendo, por consecuencia, muy mediano el producto obtenido. El precio total del juego de pesas se calcula en doscientos noventa pesos (*El Tiempo*, 16-IV-1895).

<sup>10117</sup> En la reglamentación que proyecta la 2ª división del estado mayor general del ejército, del número de tiros que debe llevar cada soldado, como asimismo el repuesto que debe conducirse en los carros y mulas llamados municioneras, "...se establece que el soldado conduzca 105 tiros, 30 en cada una de las cartucheras de delante, y 45 en la cartuchera de la espalda, número de munición suficiente para 10 minutos de fuego. Para cada compañía, como munición de repuesto de primera línea, se establece un carro con 21000 tiros y tres mulas municioneras con 2250 cada una. Los carros son dobles, pero divisibles, y llevan una lanza de repuesto que en caso de fraccionarse el carro, es utilizada por una de sus partes. Las mulas municioneras llevan cada una una cangalla, con cincha, retranca y pretal; 2 cajas de zinc con 1125 tiros cada una, 2 palos de muleta, 2 zapa picos, 1 hacha de leñador, 1 tijera corta-lata con cadenilla, 6 herraduras, y 100 clavos, 1 saco tela impermeable, 1 tenaza, 1 martillo, 1 despojador, todo esto como útiles de campaña. El peso total que lleva cada mula es de 119 kilos 180 gramos" (*El Diario*, 8-XII-1896).

<sup>10118</sup> Fuente: Lo que pasa en el Arsenal. Hablemos claro. Juzgue el Pueblo, *El Tiempo*, miércoles 13 de marzo de 1895)

<sup>10119</sup> Fuente: Lo que pasa en el Arsenal. Hablemos claro. Juzgue el Pueblo, *El Tiempo*, miércoles 13 de marzo de 1895). La explosión habida en el Arsenal de Guerra no ocurrió en la forma que lo refiere un colega periodista, ni tampoco como lo ha informado el Ministro de Guerra, y el ingeniero Krause, director de ese establecimiento. El hecho ocurrió según *El Tiempo* de la siguiente manera: "...Se estaban calibrando cartuchos remington de fogueo, y la máquina que hace esta operación, al calibrar uno, por medio de su matriz calibradora, produjo su explosión. Como la máquina tiene un plato giratorio donde los cartuchos se colocan para ser calibrados por aquella palanca, la explosión del cartucho contaminó el fuego a todos los demás que había en dicho plato giratorio. El fuego de aquí se comunicó al cajón depósito de los cartuchos calibrados, contigua a dicha máquina. Estas explosiones de cartuchos, por esa causa, son continuas. Al pié de la máquina, por imprudencia del jefe de talleres, señor Dekendey, habían quedado ocho cajones con ocho mil cartuchos de fogueo, que el jefe de taller de cartuchos había pedido a dicho jefe las entregara a los depósitos por estar terminados. El fuego del cajón-depósito de la máquina se comunicó a estos otros cajones produciéndose la gran explosión. El operario Pedro Bedoya, resultó completamente, en la cara, cabeza y brazos. Otro operario que trabajaba con él, resultó ileso. La explosión hizo temblar el edificio del taller, produciendo la ruptura del techo de vidrio. En los altos del taller de cartuchos funciona el taller denominado mixto. Los operarios de este, al ver temblar el edificio, y oír la explosión, intentaban saltar por las ventanas, lo que les hubiera ocasionado la muerte, por lo alto del edificio. Los operarios de los demás talleres, al oír la explosión, fugaron en dirección a la calle, y en la puerta de la calle de Pozos y Garay hubo que colocar diez soldados para evitar la fuga. La explosión ha producido además la rotura de la máquina, que ha costado miles de pesos, desperfecto en las instalaciones de la luz eléctrica, colocadas en dicho taller (*El Diario*, 11-IX-1896). No en vano, un año antes, numerosos vecinos de Flores habían solicitado del Gobierno se dispusiera "...que el polvorín allí existente sea destinado a otro fin que a depósito de pólvora y materias inflamables, por el peligro que esto encierra para la población que lo rodea. Ese polvorín es actualmente un obstáculo para el adelanto de esa parte del municipio, pues todos huyen de su proximidad y sólo la necesidad hace que algunos vecinos continúen en sus alrededores" (*El Tiempo*, 3-IV-1895)

<sup>10120</sup> Fuente: Lo que pasa en el Arsenal. Hablemos claro. Juzgue el Pueblo, *El Tiempo*, miércoles 13 de marzo de 1895)

<sup>10121</sup> Una casa norteamericana se presentó "...al gobierno ofreciendo en venta un aparato al que llama apoyo para el tiro, el cual deberá tener conveniente aplicación para el fuego efectuado desde la posición cuerpo en tierra. El apoyo propuesto consiste en dos varillas de aluminio, largas de treinta o cuarenta

---

centímetros que se levantan en el suelo y cuyo extremo superior termina en una horquilla móvil que permite descansar el fusil para apuntar y hacer fuego” (*El Diario*, 14-IV-1896).

<sup>10122</sup> De un periódico extranjero *El Tiempo* toma: “El Ejército inglés ha sido el primero que le ha dado a su servicio velocipedico una extensión notable. No se ha limitado a emplear a los velocipedistas en el servicio de transmisión de correspondencia y ordenes sino que desde un principio, en 1888, les ha hecho efectuar reconocimientos, sorpresas y los ha empleado en el servicio de seguridad. Como medios de transportes, los velocipedistas militares ingleses cuentan con bicicletas, tandems y multiciclos; están dotados además de un material completo para interceptar las comunicaciones y en fin ha querido hacerlos artilleros. Pues bien, se está produciendo un cambio de opinión en Inglaterra y los patines de ruedas, que tuvieron su cuarto de hora en Francia, están a punto, según parece, de destronar a la bicicleta en el ejército británico. Inútil es buscar bicicletas livianas y desarmables, que el soldado pueda llevar a campo travieso; el sistema que pudiera obtenerse, no ofrecerá nunca tantas ventajas como las que ha puesto en evidencia el patín, en experiencias recientes. El patín es de una solidez a toda prueba y de muy poco peso; se puede conseguir con él, en una carretera común, velocidades de 16 a 18 kilómetros por hora. Cuando el camino es malo o el paso difícil, bastan algunos segundos para sacarse los patines y atarlos en la mochila o en la empuñadura del sable bayoneta; no se tiene necesidad de mayor tiempo para colocarlos nuevamente y servirse de ellos, ahorrándose de esta suerte, llevar una carga de 10 o 12 kilos, varios kilómetros. Los ingleses, no quieren reservarse este descubrimiento, pues *El Secolo*, de Milan, anuncia que el general Ferrero, embajador de Italia en Londres, acaba de recibir, para el ejército italiano, varios pares de patines de los que se han adoptado en el ejército inglés. Las divisiones de Roma y Alejandría, serán las que recibirán estos instrumentos y experimentarán esta clase de locomoción. Nos parece que el patín, reemplazará con mucha dificultad a la bicicleta y creemos conveniente guardar reservas sobre las ventajas que ocasionará este cambio y sobre las velocidades indicadas por los ingleses” (*El Tiempo*, 16-VIII-1895)

<sup>10123</sup> Llegó al conocimiento de la redacción de *El Tiempo*, que “...en breves días, será presentado a la aprobación del gobierno —por el teniente de fragata Luisoni— un proyecto acompañado del dibujo respectivo, de un torpedo de fondo, semejante al sistema Wileghan, pero que lo modifica en muchas partes” (*El Diario*, 4-VIII-1898). Asimismo, por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto que el Arsenal entregue al señor Gibiard un fusil remington, a fin de que este señor pueda aplicar el aparato de que es inventor, y el cual, como ya lo hemos anunciado tiene por objeto hacer en ocho días, de un chambón, un tirador respetable. Mr. Gibiard empezará su trabajo, tan pronto como se le entregue el fusil referido, y poco después, los técnicos podrán decir si tenemos o no el medio material de que nuestras tropas no desperdicien un tiro (*El Diario*, 2-VI-1896). A cada uno de los jefes que se encuentran en las capitales de provincia en comisión para la instrucción de tiro, en breve se remitirá una caja de monos para la instrucción táctica en las academias de jefes y oficiales de la guardia nacional. Dichas cajas de monos han sido construidas bajo la dirección del teniente coronel Robert y representan en figuritas de palo el personal completo de un batallón de infantería, según la táctica vigente en el ejército (*El Tiempo*, 4-V-1895). A la Junta Superior de Guerra le fue presentado “...un modelo de puente flotante de 30 metros de largo y de \$12.000 pesos de costo. El puente, al decir de su inventor, deja bizcos a todos los puentes que se han construido en el mundo. Por encima de ese camalote de madera, pueden pasar cañones, cureñas, soldados, mugeres, tambores, cornetas, proveedores, etc. Sin que haya peligro de incidente alguno. Nosotros hemos visto el invento, y creemos que como obra de ingeniería militar, apenas vale lo que valían aquellos puentes de la calle México en la época de los terceros. Sin embargo, algo útil tiene el puente referido; y, eso útil son las chalanas en que descansa (teóricamente hablando) las que pueden ser empleadas, una para cargar los pesos importe de la invención y otra para lavar los pañuelos-mapa que alguien propuso para nuestras tropas” (*El Tiempo*, 14-VIII-1895). La Dirección del Arsenal de Guerra ha comunicado al ministerio del ramo haberse construido en los talleres de ese establecimiento diez modelos de la pala zapa-pico, modelo del teniente 1º de artillería Arturo Luisiani (*El Diario*, 23-VII-1896). En la sesión de ayer 5 de abril de 1895, la Junta Superior de Guerra resolvió rechazar el proyecto del Estado Mayor dotando a nuestros regimientos de artillería de una escalera especial para facilitar a los comandantes de batería y jefes de sección la visión del punto de caída del proyectil para la rectificación de la puntería. Uno de los argumentos más poderosos que se han hecho contra el proyecto, ha sido de que hoy no se utiliza para la apreciación preliminar de la distancia la granada de percusión, sino la de tiempo, que explota sin necesidad de choque (*El Tiempo*, 6-IV-1895)

<sup>10124</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)

- 
- <sup>10125</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)
- <sup>10126</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)
- <sup>10127</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)
- <sup>10128</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)
- <sup>10129</sup> Fuente: MILITARES-Ametralladora Peruana (*El Tiempo*, 2-XI-1897)
- <sup>10130</sup> Pólvoras y proyectiles (*El Diario*, 23-VIII-1895).
- <sup>10131</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10132</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10133</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10134</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10135</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I. También en Inglaterra, en unas experiencias de tiro en Woolwich, se habían querido hacer en 1895 diversos ensayos con un pequeño cañón fijo al lomo de un caballo. El caballo "...fue atado a un poste, por el pescuezo y el cañón dirigido contra un blanco, en tanto la comisión se colocó detrás del animal. Se hizo uso de una mecha larga que fue encendida, su chisporroteo inquietó al caballo, que como no estaba atado sino por el pescuezo, empezó a dar vueltas alrededor del poste. Cuando salió el tiro, la boca del cañón estaba frente a los miembros de la comisión que no tuvieron tiempo sino para echarse barriga al suelo. La bala silbó por encima de la ciudad de Woolwich y cayó en un astillero. En cuanto al caballo, estaba acostado con el lomo en el suelo a algunos metros" (*El Tiempo*, 25-IV-1895)
- <sup>10136</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10137</sup> El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al tercer disparo (*La Prensa*-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-I.
- <sup>10138</sup> *La Prensa*, 16-III-1905, p.7, columnas 6 y 7. Capdevila se suicidó en marzo de 1905, y en medio de la profunda conmoción que produjo este hecho trágico despidieron sus restos el Ministro de Guerra Gral. Enrique Godoy, el Teniente Coronel Tomás Vallée, Roque Sáenz Peña, y Manuel Carlés.
- <sup>10139</sup> Sobre la construcción y destrucción del misil Cóndor II en tiempos de Menem, ver Barcelona y Villalonga, 1992.
- <sup>10140</sup> Gral. de Brigada Isidro Arroyo al Ministro de Guerra, Bs. As. Mayo de 1929 (AGE, Leg.8681), reproducida en forma íntegra en el Apéndice L-IV.
- <sup>10141</sup> Rouquié, 1981, I, 154-155; y Cútolu, 2004, 135. Sobre Fábrica de Pólvora, ver General Andrés Eugenio Rodríguez, AGE-Leg.11.191
- <sup>10142</sup> Gral. de Brigada Isidro Arroyo al Ministro de Guerra, Bs. As. Mayo de 1929 (AGE, Leg.8681), reproducida en forma íntegra en el Apéndice L-IV.

---

<sup>10143</sup> Gral. de Brigada Isidro Arroyo al Ministro de Guerra, Bs. As. Mayo de 1929 (AGE, Leg.8681), reproducida en forma íntegra en el Apéndice L-IV.

<sup>10144</sup> Gral. de Brigada Isidro Arroyo al Ministro de Guerra, Bs. As. Mayo de 1929 (AGE, Leg.8681), reproducida en forma íntegra en el Apéndice L-IV.

<sup>10145</sup> Rouquié, 1981, I, 276 y 277.

<sup>10146</sup> La logística es la parte de la ciencia militar que calcula, prepara y realiza cuanto se refiere a la vida, movimientos y necesidades de las tropas que están en campaña (Diccionario Digital del Grupo de Ciencias Militares). Han empezado a recibirse en el estado mayor del ejército las memorias de los jefes de las divisiones y brigadas que se formaron con motivo de la última movilización. Las memorias traen interesantes datos sobre la instrucción que han recibido las tropas, la contextura física de estas, los servicios prestados por la sanidad militar e intendencia de guerra (*El Diario*, 7-VII-1896).

<sup>10147</sup> La Intendencia militar era el cuerpo del ejército de tierra encargado de proporcionar los elementos necesarios para la vida de las tropas; oficina o establecimiento que pertenece a este servicio (Grupo de Ciencias Militares). En cuanto a las comunicaciones con Córdoba, todo el trayecto se irán estableciendo estaciones ópticas y eléctricas, tendiendo en el llano líneas eléctricas de campaña, de alambre descubierto y en la sierra estableciendo cables de montaña y estaciones ópticas, de modo de mantener comunicación rápida en todo el circuito (*El Diario*, 16-IX-1898)

<sup>10148</sup> Al empezar la epidemia en enero de 1895 el médico militar ordenó "...que se diera a la tropa agua cocida, prescripción que no pudo cumplirse por falta de leña. Esta se entrega a los cuerpos a razón de dos astillas por soldado y se tenía sólo la absolutamente necesaria para hacer la comida. Si se empleara en cocer agua tendría la tropa que quedarse en ayunas (*El Tiempo*, 29-I-1895). La Intendencia de Guerra tiene listo para entregar al cuerpo de sanidad militar, "...a fin de que acompañe a los cuerpos en instrucción, un carro de cirugía de los muchos que hay allí depositados, como así otro de desinfección y dos ambulancias, a fin de que el cuerpo de sanidad de guardia nacional, y la compañía de enfermeros y camilleros tenga oportunidad de practicar, con esos elementos (*El Diario*, 18-VIII-1898). Ayer nos decía un médico, que "...hacía como quince días que los enfermos del hospital no tomaban yoduro de potasio, pues a pesar de haberse pedido anticipadamente, aún no le había sido provisto. Los aparatos para baños de mar, adquiridos por \$40.000 m/n, no pueden funcionar porque se niegan los fondos, mil pesos cuando más, para instalarlos debidamente. Hace como quince días que el médico del batallón 11 de infantería de línea, ha pasado una nota, manifestando que no puede asistir los enfermos porque no tiene los medicamentos, y la sanidad no los ha provisto porque en la farmacia no hay" (*El Diario*, 29-VIII-1896). La comisión de médicos del cuerpo de sanidad del Ejército que se encuentra en Europa, encargada de adquirir material y equipo para los 210 carros que se construyen en el Arsenal de Guerra, ha comunicado al Gobierno que esos elementos podrán estar en esta capital a principios del mes entrante. *El Tiempo*, 8-VI-1895.

<sup>10149</sup> Para el abastecimiento de subsistencias, ver Nellar, 1972, II, 122-125. El racionamiento diario del soldado "...se compone actualmente de carne, galleta, arroz y sal, en todo tiempo y lugar. A veces cuando faltan en campaña los víveres, se sustituyen estos dándole a la tropa doble ración de carne. En las épocas de frío, se agrega una ración llamada extraordinaria que comprende café, azúcar y caña. Además existe la ración mensual de entretenimiento compuesta de yerba, tabaco, jabón y papel de fumar. El cirujano de brigada Dr. Ramón Jiménez, que ha estudiado detenidamente y con éxito la alimentación de los ejércitos europeos y que además conoce muy especialmente el ejército argentino, ha recibido encargo de proyectar un tipo de racionamiento para tropa en campaña y en guarnición....Sería oportuno, ya que se tratan estas cosas, encomendar a quienes corresponda un estudio análogo, respecto a la calidad y cantidad de los forrajes que deben darse al ganado del ejército en marcha y en guarnición" (*El Diario*, 12-III-1896)

<sup>10150</sup> Una disposición que ha sido recibida con general aprobación es la que ha tomado el ministro de la guerra, por indicación del jefe del Estado Mayor, suprimiendo el racionamiento a los cuerpos de ejército por el sistema añejo de las proveedurías (*El Tiempo*, 6-IX-1895)

<sup>10151</sup> La distribución de los uniformes entre los conscriptos planteaba toda suerte de problemas. Cada gobierno de provincia debe saber a la fecha del llamado a las filas, "...el número de individuos que cada departamento o partido tiene comprendidos en la clase de 20 años y con este dato, la distribución del uniforme habría sido segura y sencilla. Los reclutas irían llegando a los puntos de reunión, ya uniformados, sin tener que perder el traje civil lo que para muchos importará un perjuicio bastante grande. Si se tiene en vista que, terminados los 60 días de ejercicio, la clase movilizada debe formar parte del ejército permanente hasta completar el año de servicio que le corresponde, se ve cada individuo debería llevar consigo su uniforme, con cargo de guardarlo y conservarlo, a fin de estar pronto para acudir ya vestido con el traje militar al primer llamado del gobierno (*El Diario*, 5 y 6-IV-1896).

<sup>10152</sup> Existía un tipo reglamentario de espada para el uso de jefes y oficiales del ejército "...y cada cual usa la que más bonita y mejor le parece, la que le han regalado o le cuesta más barata; así es que se ven colgar de la cintura de nuestros militares, espadas rectas, cortas, largas, plateadas, doradas, sui generis; con empuñadura de marfil, nácar, hueso, metal, etc.; sables, espadines, tizonas, y el diablo más cuatro. No se han colgado machetes de vigilante no sabemos por qué;" (*El Tiempo*, 16-II-1895). Recuerda la mencionada orden, que el saludo militar "...es obligatorio y recíproco entre todas las jerarquías, y que el uso de la espada es de rigor siempre que se vista de uniforme. Desaparecerán por consiguiente los elegantes bastones y no se verá por las calles, el ridículo espectáculo que dan muchos militares cuando no contestan el saludo de sus subalternos" (*El Tiempo*, 18-IX-1895).

<sup>10153</sup> El reglamento vigente "...manda, por ejemplo, que el kepi debe tener visera cuadrada, como la del antiguo reglamento, charolada en la parte superior y de cuero verde en la inferior, y que la copa sea de seis y medio centímetros de alto sobre el aro. Pues bien: existen dos partidos en la cuestión del kepi: el uno, afecto al kepi reglamentario, y el otro, adverso: éste dice que la antigua visera es una compadrada, y que la que corresponde a la decencia del ejército es la visera redonda y gacha, contraria al reglamento oficial. Y como lo dicen lo hacen, y van los unos con una visera y los otros con otra, y las autoridades superiores, también dominadas por la anarquía, no saben o no pueden imponer orden y respeto, y la que sabe, como siempre, perniquebrantada es la disciplina y la moral militar (*El Tiempo*, 16-II-1895). El kepi es igual para todos con solo la distinción del emblema en el aro" (*El Diario*, 2-V-1896). Pero apenas han empezado a vestir los militares el nuevo uniforme, "...cuando ya lo han reformado a su gusto, en detalles, por ahora, y más tarde es de presumir será en conjunto. Las insignias hasta la jerarquía de capitán deben ser de metal, según el nuevo reglamento, y sin embargo los oficiales, de subteniente a capitán, las usan bordadas. La visera del kepi, debe ser gacha, la usan recta, y así en otros detalles" (*El Diario*, 11-VII-1896). A la sastrería militar para jefes y oficiales se le ha prometido darle los elementos que necesite para su marcha regular. En 1898, esa oficina confecciona los uniformes para los cadetes del Colegio Militar y ha entregado hace pocos días los de paseo y de parada para la escolta presidencial, que es una fuerza que consume en equipos, vestuario y alquiler de la mansión de la calle Callao, una mensualidad exorbitante que debe pasar agregada al proyecto de economías (*El Diario*, martes 27 de setiembre de 1898). En cuanto a los botines, "...el hilo es de mala calidad o no está bien encerado, pues cuando se humedece el calzado, a los pocos días las costuras del botín empiezan a descoserse, inutilizando el uso del mismo, como también la humedad penetra fácilmente por la calidad de la suela, la que, no obstante su espesor, no presenta resistencias al paso una vez que se moja un poco. La simple vista de la construcción de los tacos de los referidos botines y los clavos empleados en él, demuestra que es un trabajo sumamente deficiente, que justifica plenamente la frecuencia con que se salen del calzado a la menor pisada un poco fuerte" (*El Tiempo*, miércoles 20 de octubre de 1897).

<sup>10154</sup> *El Tiempo*, 16-III-1895.

<sup>10155</sup> Para mayo de 1896 podía darse por aprobado el reglamento de uniformes confeccionado para el ejército, pues éste "...como el de la Armada, de que nos ocupamos días pasados, es sencillo y severo. Se suprimen los relumbrones y se unifica para todas las armas el traje....En lugar de estrellas en la boca-manga los oficiales y los jefes usarán galones; y, en cuanto al traje de gala, no será obligatorio sino en las fiestas nacionales, cuando se acompañe al poder ejecutivo en comitiva. Se reglamentan dos trajes, uno para diario y paseo, y otro para campaña, este último, cómodo, barato y de un color adecuado" (*El Diario*, 2-V-1896). Pero apenas han empezado a vestir los militares el nuevo uniforme, "...cuando ya lo han reformado a su gusto, en detalles, por ahora, y más tarde es de presumir será en conjunto. Las insignias hasta la jerarquía de capitán deben ser de metal, según el nuevo reglamento, y sin embargo los oficiales,

---

de subteniente a capitán, las usan bordadas. La visera del kepi, debe ser gacha, la usan recta, y así en otros detalles” (*El Diario*, 11-VII-1896).

<sup>10156</sup> Debido a la orden general, los sacos azules con alamares negros, botones y muletillas, y las capas con vistas de terciopelo rojo y azul eléctrico, pasarán a revistar en los guardarropas, a la espera de alguna comisión lejana que permita darles nuevamente de alta sin correr el riesgo de ir a inspeccionar el relevo de las guardias de algún cuartel (*El Tiempo*, 18-IX-1895). En materia de cambios, en junio de 1896 “...se suprimió el color azul reemplazándolo por el negro. Estamos de acuerdo en que este es más elegante para pasearse por la calle Florida, o para asistir a la Opera y al Club del Progreso; pero indudablemente es inferior al azul, si se tiene que ir a prestar servicios en el Neuquén o en el Chaco. Así lo piensa, al menos, la mayoría de los oficiales y jefes del ejército (*El Tiempo*, sábado 20 de junio de 1896).

<sup>10157</sup> Otro punto que no ha dejado de llamar la atención de todos, es la supresión de la capa para los oficiales de caballería y artillería y el poncho para la tropa de las mismas (*El Tiempo*, sábado 20 de junio de 1896). El Estado Mayor del Ejército proyectó una reforma en el uniforme de los jefes y oficiales donde se trataba de “...cambiar la presilla que ahora usan, hasta teniente coronel inclusive, por unas hombreras, que según algunos resultarán muy elegantes” (*El Tiempo*, 26-X-1897).

<sup>10158</sup> Las curiosas caravanas de lo que el editorialista del periódico *El Diario* denomina soldados paisanos “...han desfilado durante la tarde y la noche de ayer y mañana de hoy por nuestras calles. Decíamos soldados paisanos, porque era el aspecto que ofrecían los licenciados, sirviendo de representación viviente del nuevo sistema de nuestra organización militar, que reposa más directamente que en otro tiempo sobre el total de los ciudadanos. Como a todos se les ha entregado las pilchas con que llegaron a Pigüé, guardadas durante la campaña en los depósitos de la intendencia y transportadas aquí inmediatamente después que a las tropas, cada soldado era tipo raro, digno de ser observado. Los había con kepi, de poncho criollo color café, botas, una guitarra en una mano y un atadito en la otra. También con chambero, uniforme completo, balija y pava” (*El Diario*, 16-VI-1896)

<sup>10159</sup> Hemos tenido ocasión de ver a varios capitanes de banda de música de diferentes cuerpos del ejército, haciendo uso de las insignias correspondientes a los oficiales de guerra. Como por el reglamento de uniformes vigente, está dispuesto que los que guerrear soplando lleven galones blancos y no amarillos, llamamos sobre ello la atención de las autoridades militares encargadas de hacer respetar los reglamentos.....En la mayoría de los cuerpos de ejército los maestros de banda usan galones dorados, en ves de blancos, y los de infantería y artillería de marina, usan las presillas correspondientes a oficiales de guerra (*El Tiempo*, 7-VIII-1895)

<sup>10160</sup> También se suprimió entre la tropa el poncho, que es una prenda indispensable en fronteras y nunca será reemplazado por otra prenda mejor, porque no sólo abriga al soldado, sino que le preserva la montura en los días de lluvia (*El Tiempo*, sábado 20 de junio de 1896). Las alpargatas que se le distribuye a la tropa son, “...en cuanto a su calidad buenas, pero se ha comprobado una vez mas, que no sirven para las marchas en ningún terreno, que la plantilla es sumamente flexible y al pisar un terreno desparejo o en los cascotes y pequeños fragmentos de esta naturaleza, la planta de los pies sufre, haciendo, después de una jornada más o menos larga, padecer de ellas al soldado. Este inconveniente se eliminaría si a mas de la plantilla tejida que constituye la suela de la alpargata, se agregara a esta otra plantilla de cuero más o menos gruesa, de manera que pudiera hacer aquella más resistente y que las puntas de las piedras y cascotes no produjeran los dolores que hoy ocasionan” (*El Tiempo*, miércoles 20 de octubre de 1897). Hasta entonces la tropa “...ha gastado el zapato-crimea llamado de munición que destruyó los pies, y es molesto para las marchas, confeccionando con materiales toscos, y de fácil destrucción (*El Diario*, 24-XI-1896).

<sup>10161</sup> La Intendencia de Guerra se ha dirigido al Ministerio de la Guerra haciéndole presente que a las oficinas de enganche se les provee de vestuario para los enganchados y que cuando estos son distribuidos en los cuerpos, los jefes de estos, solicitan vestuario para las nuevas altas, por donde resulta que a cada enganchado se le provee de doble uniforme, lo que es gravoso para el erario. En vista de esto la Intendencia cree que sería conveniente la confección de un uniforme especial para reclutas, de los cuales se entregaría un número fijo a cada oficina de reclutamiento, encargándose estas de recabarlas de los jefes de cuerpo, una vez que los enganchados fueran distribuidos. El uniforme reglamentario recién se

---

entregaría cuando los enganchados fueran dados de alta en los cuerpos (*El Tiempo*, martes 1° de diciembre de 1896)

<sup>10162</sup> *El Municipio*, 28-V-1895.

<sup>10163</sup> *El Municipio*, 28-V-1895.

<sup>10164</sup> El año 94 se ensayó la montura-carpa, la montura-recado, la montura-cama, etc. etc. Sin que ninguno de estos armatostes mereciese el visto bueno de las comisiones encargadas de ensayarlas y fallar. Hubo un informe favorable en pro de la montura-carpa, pero el gobierno no debió considerarlo concluyente, cuando después de someterlo a estudio de la junta superior de guerra no volvió a acordarse de él (*El Diario*, 27-V-1896)

<sup>10165</sup> En Alemania, se ha efectuó últimamente, experiencias prácticas sobre el peso del equipo de la infantería. He aquí las conclusiones a las que han llegado: “Cuando la carga del infante no pasa de 22 kilos, una marcha de 25 a 28 kilómetros efectuada en condiciones normales de temperatura, no ejerce ninguna acción perjudicial a la salud del soldado, sino que al contrario, robustece los músculos. Cuando el calor es muy fuerte, una marcha efectuada en las mismas condiciones, ocasiona en el organismo pequeñas perturbaciones, cuya influencia perjudicial se hace sentir aún al otro día. La carga de 31 kilos, obra desfavorablemente sobre el organismo del infante aún en las marchas medianas y con temperaturas frescas. El peso de 27 kilos es, por consiguiente, el máximo para los soldados que toman parte en marchas de 25 a 28 kilómetros, efectuadas en verano. En lo concerniente a la duración de la marcha, se ha notado que un peso de 22 kilos deja de ser molesto al cabo de varios días, mientras que el de 31 kilos no deja de ocasionar nunca un debilitamiento gradual del organismo, aún después de una serie de marchas. Creemos por consiguiente, que si fuera posible, se debería reducir a 22 kilos el peso del equipo propuesto por la comisión” (*El Tiempo*, 13-IX-1895). Sobre la capacidad de marcha y de carga en la historia de los ejércitos del mundo, ver Craig, 1968b, 224. En Alemania, el equipo completo del soldado en época de guerra lo constituyen prendas cuyo peso en conjunto no llega a veintiséis kilos. La Smith Tompson reglamentaria en el ejército y adoptada por la Comisión de armamento en Berlín, no “...ha dado resultado por lo excesivamente pesada, que en largas marchas destroza el cuerpo del soldado. Tales han sido las reducciones en las prendas del equipo del soldado alemán, que se ha suprimido la marmita que llevaba el soldado dando para cada cinco de estos una de aluminio. Nuestro ejército, que en caso de operaciones en determinadas zonas, no tendría medios de transporte, sino las marchas, debe estar dotado de un equipo acaso más reducido que el del soldado alemán” (*El Diario*, 22-VII-1896)

<sup>10166</sup> Concluida la visita del Comandante pasó a la Exposición Rural, “...donde se encuentra alojado el escuadrón del Regimiento 7° de caballería de línea y tuvo ocasión de ver allí uno de los caballos empleados en las pruebas prácticas de las monturas que se están ensayando para ser adoptadas como reglamentarias en caso de que reúnan las condiciones requeridas. Dicho caballo, a pesar de haber transcurrido más de 15 días desde que se efectuó la prueba, se encuentra en un estado deplorable” (*El Tiempo*, 22-IV-1895)

<sup>10167</sup> Los fabricantes que se presentan a los concursos “...parten de una idea equivocada; han oído decir que el ejército argentino es un ejército sui generis, cuyas tropas montadas deben tener la rapidez del grupo de indios que venía al malón, y en consecuencia, le inventan monturas que podrán ser muy livianas, muy cómodas para enlazar, etc., etc., pero que no son ni pueden ser monturas militares. Se dice que entre nosotros la caballería vivirá perpetuamente en vivac, y allá van combinaciones de recados-tiendas, de monturas-abrigo, de sillas-barraca; es decir, todo un mundo de invenciones, más o menos hábiles, pero que el buen sentido aconseja prescribir” (*El Diario*, 31-V y 1-VI-1896)

<sup>10168</sup> En Alemania la adquisición de caballos se efectúa “...por seis comisiones que constan de un presidente, que puede ser un oficial superior o un capitán y de tres vocales, dos tenientes y un veterinario, a los cuales se agregan un secretario y varios soldados ordenanzas. Estas comisiones se forman en la estación determinada para la compra y sólo los presidentes son permanentes y revistan en el Ministerio de la Guerra; los vocales son oficiales de los regimientos de caballería o artillería. Cada comisión opera en un radio determinado y los caballos comprados se envían a los depósitos de remonta para ser distribuidos a los cuerpos. La edad determinada para la compra es la de 3 a 4 años y los animales deben pasar uno o dos años en los depósitos antes de ser entregados a los cuerpos. Estos depósitos en número de 21, de los

---

cuales 16 corresponden a Prusia, 1 a Sajonia, y 4 a Baviera, dependen directamente del Ministerio de la Guerra y son grandes establecimientos que contienen de cuatrocientos a quinientos caballos y cuya explotación se dirige de modo que puedan subvenir a sus gastos. Además de estos depósitos hay en Prusia tres grandes establecimientos de yeguas del Estado para fomentar la propagación de las razas convenientes para el ejército. Estos establecimientos cuyo objeto es producir buenos sementales, dependen del Ministerio de Agricultura y costean sus gastos con la explotación de las tierras que les están asignadas y con la de los sementales, que en determinada época del año sirven las yeguas que llevan los hacendados de las comarcas en que está situada la estación semental, mediante el pago de una cantidad que varía entre 6 y 300 marcos (1.50 y 75 \$m/n)” (*El Tiempo*, 11-V-1895)

<sup>10169</sup> Ver Nellar, 1972, II, 422. En caso de que la caballería tuviera que entrar en campaña inmediatamente se vería “...en la necesidad de expropiar caballos en los establecimientos cercanos a los puntos en que los cuerpos están de guarnición; lo cual nos proporcionaría la ocasión de ver reproducido un cuadro que la administración militar debía haber hecho relegar al olvido, es decir, medio regimiento en marcha con arreglo a los preceptos teóricos, y el otro medio, disperso en el campo jineteando potros que se pierden a la distancia, dando vertiginosos corcovos y por aquí y acullá, una montura, un ginete,, un sable, o una carabina en el suelo arrojados por el potro y por nuestra falta de administración” (*El Tiempo*, 8-V-1895)

<sup>10170</sup> De un periódico francés que bien podría tratarse de *La France Militaire*, el periódico *El Tiempo* toma los siguientes párrafos referentes a la aplicación de los perros en las operaciones de guerra: “La educación de un perro es larga, es delicada. Se precisa, por lo menos un año para obtener resultados. Es un trabajo de paciencia que exige mucho cuidado y una observación constante. Y todo esto ¿para conseguir que resultados? Para hacer reconocer al enemigo por el perro y utilizarlo de noche en los puestos avanzados. Por otra parte, el perro es con frecuencia inclinado a vagar, puede escaparse, e ir a correr por los campos: por consiguiente puede caer en poder del enemigo, indicar la presencia de la tropa a la que pertenece y en caso necesario, hasta servir de guía. Esto puede ocurrir con frecuencia. A pesar de la vigilancia más activa, en ciertos momentos y sobre todo en determinadas épocas, los perros franceses si bien pueden haber aprendido a aborrecer los uniformes alemanes, pueden perfectamente fraternizar con las perras alemanas que, por cierto, no visten uniforme. En esa época, no se puede hacer nada con el perro, que se rehusa a toda clase de servicio, y en campaña, no hace absolutamente sino lo que quiere. Como se ve hasta los militares de la familia canina están sujetos al yugo de la influencia femenina” (*El Tiempo*, 12-IX-1895).

<sup>10171</sup> La revolución ferroviaria aceleró en seis veces las marchas de los ejércitos, ver la comparación con las marchas de Napoleón en Holborn, 1968, 52. Las tropas transportadas por ferrocarril ocurrieron por vez primera entre 1847 y 1850 (Holborn, 1968, 52).

<sup>10172</sup> Holborn, 1968, 64.

<sup>10173</sup> Está para llegar a esta capital, el regimiento 3 de caballería procedente de Patagones, y que manda el comandante Urquiza. Este cuerpo hace 20 años que no viene a poblado y se le manda bajar para proceder a su reorganización y dar a su tropa y oficiales el descanso necesario que produce una guarnición de ciudad (*El Diario*, 14-II-1896)

<sup>10174</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10175</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10176</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10177</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10178</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10179</sup> El Ministro de la Guerra se dirigirá a todas las empresas de ferrocarriles comunicándoles que deben colocarse en condiciones de poder en cualquier momento transportar caballos a cualquier punto de la

---

república. Se toma esta medida para que la entrega de los caballos no sufra entorpecimientos de ninguna clase y pueda llevarse a cabo con la prontitud que las circunstancias lo reclaman en bien de nuestra pronta organización militar (*El Tiempo*, 26-X-1895)

<sup>10180</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).

<sup>10181</sup> Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 1905 (AGE-Leg.12.931-folio 234-255 de la DGP-folio 204-237 del EMGE, reproducido completo en Apéndice H-II).

<sup>10182</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10183</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10184</sup> De los cien mil cartuchos, solo llegaron al campamento de Luján, punto donde estaba acampada aquella división, 35.000, y el resto no se sabe aún donde ha ido a parar, a pesar de las gestiones hechas en ese sentido. Las empresas de ferrocarriles se disculpan, arguyendo que pueden estar depositados por error en algún galpón de carga, pero el hecho es que, los cartuchos importan cerca de 4000 pesos, y que no llegaron a su destino como se ordenó (*El Diario*, 12 y 13-VII-1896)

<sup>10185</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10186</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10187</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10188</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10189</sup> Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, *El Tiempo*, 12 de febrero de 1895

<sup>10190</sup> Para la Comisaría General de Guerra, ver Nellar, 1972, I, 512-515. Sobre el cuartel como vivienda colectiva en España y sus Posiciones durante el Siglo XVIII, ver Moncada Maya, 2003. Como se recordará, primero en el acantonamiento de Santa Catalina (Lomas de Zamora), en Diciembre de 1897, se derrumbó un cuartel causando varias muertes de soldados; y casi un año más tarde en Santo Tomé (Corrientes) fueron construidos unos cuarteles por el regimiento 6 de caballería y el 12 de infantería, que también se derrumbaron poco después de habitados por este último cuerpo; y causa por la que se ordenó la traslación del mismo al Paraná (*El Diario*, 23-VIII-1898).

<sup>10191</sup> *El Diario*, 16 y 17-X-1898.

<sup>10192</sup> *El Diario*, 16 y 17-X-1898.

<sup>10193</sup> *El Diario*, 16 y 17-X-1898.

<sup>10194</sup> Son tres los derrumbes de cuarteles que han ocurrido en estos últimos tiempos. El primero fue en la calle de Azcuénaga, el segundo en Río IV, y el último el que nos ocupa (*El Tiempo*, 20-XII-1895).

<sup>10195</sup> El 19 de diciembre de 1895 se derrumbó un cuartel en el acantonamiento de Santa Catalina (Lomas de Zamora), produciéndose una decena de muertos y 62 heridos (*El Tiempo*, 19, 20, 21 y 23-XII-1895). La gerencia del ferrocarril del sur puso a disposición del Estado Mayor tres trenes expresos para trasladar los batallones 8º, 9º y 5º, que con el 4º formaban brigada en Santa Catalina. El derrumbe reconocía por causa el fuerte viento y la lluvia, habiendo caído la pared y el techo de la cuadra donde dormía la 2ª compañía del 4º batallón (*El Tiempo*, 19-XII-1895, 2ª edición). Entre los muertos hubo cuatro cadetes, de apellidos Tessi, Munilla, Martínez y otro que el cronista manifestó ignorar. El hecho ocurrió a las tres de la madrugada, cuando se desató un viento furioso que arrancó numerosos árboles de raíz. La 2ª compañía del 4º batallón dormía en uno de los galpones del cuartel cuando su capitán Adolfo Medina sintió como si

---

vacilasen las paredes, cayendo varios ladrillos del techo. Se levantó al momento que el techo se desplomaba. Como el camino entre Santa Catalina y Lanas es muy malo el traslado de los heridos se hace con gran trabajo (*El Tiempo*, 19-XII-1895, 3ª edición). El herido más grave es el cadete Hudson, el cual fue operado en las primeras horas de la mañana. Un grupo de caballeros ingleses promovió en Lomas una colecta a beneficio de las familias de los muertos y heridos (*El Tiempo*, 21-XII-1895, 2ª edición). En el cementerio del Norte se inhumaron los restos del sargento distinguido Juan Tessi y del cadete Ricardo Munilla, sobrino carnal del Coronel Ramón Munilla. El conocido actor Juan Orejón, empresario del Teatro de la Victoria y el señor Uranga, dueño del Frontón Buenos Aires, han ofrecido dar una función a beneficio de las víctimas del derrumbe. Se ascenderá a teniente 2º al subteniente Blanco, que llevó el primer parte al jefe del Estado Mayor. Al sargento Herrera se le han sacado los grillos que tenía antes del suceso, en mérito a su acción de ayer. No se ha conseguido aprehender a tres soldados que se fugaron de Santa Catalina en momentos en que ocurrió la desgracia y que se hallaban detenidos en las proximidades de éste (*El Tiempo*, 20-XII-1895). El 20 de diciembre de 1897, al cumplirse el segundo aniversario del desastre, se celebraron honras fúnebres con presencia del 4 de Línea por los soldados y clases muertos en el derrumbe de Santa Catalina. En el homenaje estuvieron presentes, entre otros, Catalina R. de Tessi, Celestina Pérez Millán, Delisa R. Burzaco, y el Teniente Coronel Eduardo Munilla (*El Tiempo*, 20-XII-1897).

<sup>10196</sup> La tropa del 4 de Línea afectada por este desastre, tuvo que trasladarse a los cuarteles de Palermo, y más luego a inmediaciones del Arsenal de Guerra, en cuyas vecindades de la calle Brasil acamparon las familias de sus soldados voluntarios (Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896).

<sup>10197</sup> Tres años más tarde sucedió otro tanto en Santo Tomé (Corrientes), donde habían sido construidos unos cuarteles para el regimiento 6 de caballería y el 12 de infantería, que se derrumbaron poco después de habitados por este último cuerpo; y causa por la que se ordenó la traslación del mismo al Paraná (*El Diario*, 23-VIII-1898)

<sup>10198</sup> Los techos se hunden y las paredes están muy mal construidas, como se pudo comprobar en la visita hecha por el Ministro Villanueva (*El Tiempo*, 19-XII-1895, 1ª edición).

<sup>10199</sup> Pero donde más tiene que hacer el jefe del Estado Mayor, es en Maldonado (Palermo). Algo ocurre allí anormal, pero algo que viene de muy atrás y que tiene que aclararse muy pronto, por cuanto eso afecta no solamente los intereses de la nación, sino hasta el propio decoro del ejército. En el cuartel del Maldonado se alojó el 2º de caballería, hoy acampado en Villa Mercedes. Por orden del gobierno se colocó allí un pozo semisurgente, con el objeto de facilitar agua a los cuerpos que se alojasen en ese local. Cuando aquel regimiento se marchó, el cuartel quedó abandonado por un corto espacio de tiempo, y en esos días han desaparecido los aparatos de funcionamiento de dicho pozo, que cuesta al erario 8.000 pesos moneda nacional. ¿Quién o quienes han sido los autores de esta defraudación? Es lo que se propone averiguar el Estado Mayor dando cuenta a la justicia y pidiendo se levante una indagación sumaria (*El Tiempo*, 8-XI-1895).

<sup>10200</sup> *El Tiempo*, 15-X-1898.

<sup>10201</sup> *El Tiempo*, 15-X-1898.

<sup>10202</sup> *El Tiempo*, 15-X-1898.

<sup>10203</sup> *El Tiempo*, jueves 17 de febrero de 1898.

<sup>10204</sup> Según informes del periódico *El Diario*, para el mes de abril se podrá disponer el gobierno en la Chacarita de un lote de terreno de 12 manzanas, bien situado, a efecto de la proyectada construcción de cuarteles, con su respectiva pieza de armas. Es cantidad mas que suficiente, puesto que la extensión de cada cuartel, con capacidad que permita el uno alojar cómodamente un regimiento de infantería, y el otro uno de artillería, está calculado en 40.000 metros cuadrados, o sea 200 por lado. Los cuarteles se harán probablemente del sistema barraca, por razón de economía (*El Diario*, 13-II-1896).

- 
- 10205 *El Diario*, 28-XI-1998
- 10206 *El Diario*, 28-XI-1998
- 10207 *El Diario*, 28-XI-1998
- 10208 *El Diario*, 28-XI-1998
- 10209 *El Diario*, martes 1-IX-1896.
- 10210 *El Diario*, martes 1-IX-1896.
- 10211 *El Diario*, martes 1-IX-1896.
- 10212 *El Diario*, martes 1-IX-1896.
- 10213 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10214 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10215 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10216 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10217 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10218 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10219 *El Tiempo*, 6 de marzo de 1896.
- 10220 *El Tiempo*, 6-II-1895.
- 10221 *El Tiempo*, 6-II-1895.
- 10222 *El Tiempo*, 6-II-1895.
- 10223 *El Tiempo*, 6-II-1895.
- 10224 *El Tiempo*, 6-II-1895.
- 10225 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10226 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10227 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10228 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10229 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10230 Dictadura Militar. La soldadesca ejerciendo presión presidencial (*El Municipio*, 18-I-1895)
- 10231 El Militarismo. Extravío criminal (*El Municipio*, 20-I-1895)

- 
- <sup>10232</sup> El Militarismo. Extravío criminal (**El Municipio**, 20-I-1895)
- <sup>10233</sup> Para ver el caso de intervenciones federales cuando regían las guardias nacionales, ver Saguier, 2004.
- <sup>10234</sup> Un caso de insubordinación-El Gral Bernal contra el Dr. Llerena (**El Municipio**, martes 12-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-I.
- <sup>10235</sup> Un caso de insubordinación-El Gral Bernal contra el Dr. Llerena (**El Municipio**, martes 12-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-I.
- <sup>10236</sup> Un caso de insubordinación-El Gral Bernal contra el Dr. Llerena (**El Municipio**, martes 12-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-I.
- <sup>10237</sup> Militarización de la República (**El Municipio**, viernes 15-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-II.
- <sup>10238</sup> Un serio peligro (**El Municipio**, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-III.
- <sup>10239</sup> Un serio peligro (**El Municipio**, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-III.
- <sup>10240</sup> Los sucesos de Corrientes, **Sud América**, miércoles 22 de Julio de 1891, reproducido entero en el Apéndice E-XI. Sobre la revolución radical en Corrientes y el liderazgo del Coronel Blanco, ver Herrera, 1930.
- <sup>10241</sup> Sommariva, 1929-31, II, 240-243; Mantilla, 1972, 325; y Allende, 1964, 399. Ver también **El Diario**, del 18 de Agosto al 2 de Septiembre de 1893. A propósito de la carga de caballería y la forma de vivaquear, ver los Apéndices G-VI y G-VII.
- <sup>10242</sup> apoyado por los Secretarios Dr. Norberto Piñero y Rodolfo Rivarola, ambos historiadores, que actuaron como sus Ministros de Gobierno y de Hacienda. Basavilbaso había sido Fiscal de Estado en 1873, Camarista entre 1875 y 1884, Decano de la Facultad de Derecho en 1881 y entre 1886 y 1906 Rector de la Universidad de Buenos Aires.
- <sup>10243</sup> Mantilla, 1972, 325.
- <sup>10244</sup> General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- <sup>10245</sup> General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- <sup>10246</sup> General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- <sup>10247</sup> General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.

- 
- 10248 General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- 10249 General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- 10250 General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, Leg.13.204, fs.113-121), reproducido completo en Apéndice M-IV.
- 10251 Ver Apéndice C-XXVIII.
- 10252 Rouquié, 1981, I, 83.
- 10253 Ecos del Día-La Organización Militar (*El Diario*-17-VIII-1901), reproducido íntegro en el Apéndice M-XIV. Sobre los dos proyectos de servicio militar, ver Cantón, 1969, 367, citado en Botana, 1977, 247, nota 14.
- 10254 La Conscripción en Arcadia (Tucumán), fue en un campo a 75 km de la ciudad de Tucumán que pertenecía a Lautaro Gramajo y que había sido del ex Gobernador de Tucumán Alejandro Heredia (Páez de la Torre, 1999, 1109)
- 10255 Para un soldado en Cura-Malal, ver Rolla Bertello, 1999. Instalados en las carpas, la soldadesca le había puesto nombre a los senderos que las dividían: "...tenemos una avenida de Mayo y una Florida. Mi vecino, que vive en Florida y Rivadavia, tiene una guitarra con ayuda de la cual improvisa milongas a las cuales hacemos coro los visitantes" (*El Tiempo*, 5-III-1897). En cuanto a los alrededores del campamento, "...se había generado un vecindario, donde se tenía, "...a tres cuadras, el barrio del Comercio, unas casuchas construidas con maderas y zinc, alineadas a uno y otro lado de las calles (que pomposamente llamamos de Florida y avenida de Mayo) ocupadas en su mayoría de bodegones y fondines, una peluquería, una panadería, una carnicería, y una exhibición de vistas kalissianas" (*El Tiempo*, 7-IV-1897).
- 10256 Los regimientos del arma "...se encuentran en una circunferencia de 600 metros, situada en el medio de un monte espeso de más o menos dos leguas cuadradas, y a dos y media de la ciudad Villa Mercedes. En dicha circunferencia se alojan los regimientos 2 y 3 del arma e ingenieros, en las taperas de un ex aserradero de un Sr. Menvielle, en que abundan los murciélagos, vinchucas, chinches, etc. Y tanto la tropa como los oficiales están instalados, hablando militarmente, por regimiento en masa, tal es el reducido espacio en que se aloja cada uno de ellos, pues están poco menos que encimados. Al regimiento 1º lo han tenido que dejar en el hotel de inmigrantes, en la ciudad, por falta de alojamiento, pero sin embargo nos están estrechando aún mas, para hacer un rinconcito en que poder colocar a este último y al de artillería de montaña que debe llegar en la entrante semana. La caballada en potreros (si tales pueden llamarse) de propiedad del Sr. Menvielle, que se decía que eran alfalfares, pero oh sorpresa, son arenales: allí nuestros caballos se hacen la ilusión de que comen pasto, comiéndose unos a otros, las crines y colas, porque les falta otro alimento, y en cinco o seis días que están los cuerpos aquí, se han muerto ya once caballos. ¿Cuál será la causa Sr. Director?" (*El Tiempo*, jueves 12 de setiembre de 1895).
- 10257 Las carpas son húmedas por dentro. Parece que el rocío pasara. La tela no es suficientemente impermeable (*El Tiempo*, 29 de abril de 1898). Las carpas "...solo por extensión, merecen el nombre de tales. Cuatro pedazos de lienzo perfectamente permeables, colocados sobre dos palos de escoba, tan débiles que hoy no hay uno sano, constituyen las carpas. Dicen que estas han sido construidas en no sé que nación famosa, en la fabricación de útiles y equipos militares; pero hay que confesar que las dichas carpas son juguetes de niños. Con la lluvia que tenemos, semejan míseros barquichuelos, llenos de averías, errantes en un agitado mar, que llevan en su interior cuatro o cinco pobres diablos que maldicen de su suerte. Muchas veces, el viento agita furiosamente la pequeña vela de los diminutos barcos y derriba sus palos. El agua, como un corcel desenfrenado, ciego y cruel, pasa destruyendo. Nada tenemos seco:

---

humedad, y frío en todas partes. ¡Que tristes son las horas que pasamos de esta manera, con el alma oprimida por el desamparo! El entusiasmo languidece, vacila, como la llama de una lámpara expuesta a las ráfagas de un huracán. Se piensa en muchas cosas tristes, amargas reflexiones nos hacemos en nuestro interior, y una protesta muda pero elocuente, se anida en todos los pechos. El gobierno que sabe derrochar los dineros públicos en multitud de cosas inútiles debía preocuparse, en cumplimiento de un deber sagrado, de la salud y el bienestar del soldado, sin incurrir en los descuidos y en las negligencias imperdonables cuyos efectos se sienten ahora. Días enteros ha pasado la tropa sin tener que secarse ni en qué calentar sus miembros ateridos. Ha sufrido también hambre, cosa que parece increíble en vista de los hiperbólicos elogios que hacen los apologistas del gobierno” (*El Tiempo*, 2 de junio de 1896).

<sup>10258</sup> El sábado muchos batallones “...lavaron su ropa en el arroyo. Se eligió un sitio conveniente de modo que las aguas servidas no fuesen utilizadas después para bebida por tropas del campamento. Se han hecho puentes que conducen al otro lado del arroyo, y allí se han construido letrinas, alejando y aislando de este modo el depósito de las materias fecales del campamento” (*El Tiempo*, 29 de abril de 1898)

<sup>10259</sup> El rancho, que en cierto momento se creyó “...que mejoraría, es de pésima calidad, o se sirve a la tropa en horas inverosímiles. El fuego se hace con huesos, porque falta la leña, que debería haber a discreción en estos días crueles (*El Tiempo*, 2 de junio de 1896). En cuanto a las raciones “...nos dan dos raciones diarias y café después de diana. Han llegado al campamento vendedores de empanadas y carritos bien provistos aunque cobrando el triple. Las sardinas cuestan 60 centavos y la cerveza Pilsen 1.50 la botella. El rancho generalmente se tira y cada uno come lo que compra. El agua es ahora tan buena como allí; el gusto a alquitrán se le ha quitado, pues provenía de la cañería nueva (*El Tiempo*, 5-III-1897). En cuanto al menú de la oficialidad, los lectores de *El Tiempo* advirtieron el embeleso del redactor cuando se preguntaba “...¿Y como puede ser de otra manera cuando uno asiste a almuerzos de grande cuisine, como el que tuvo lugar el domingo en el 2º batallón del regimiento 4º? ¿Qué se festejaba? El cumpleaños del mariscalesco capitán Cadelago y el del robustísimo teniente Rodríguez. Ya el menú: fiambres surtidos, soupe a l’oignon, poulet grille sauce Veron d’Astrada, mayonaise des buitres, pavo relleno al horno, tortilla aux fins heros, dessert, vinos: Chateau Iquem, Cordero, Oporto. Licores: cognac, fin, champagne, chatreusse. Buena falta nos hizo en este almuerzo nuestro caballeresco jefe el comandante Craig, pero en cambio nuestra mesa fue presidida por el comandante Faramiñán y los mayores Calandra y San Martín, toda la oficialidad del expresado batallón, su cirujano y los corresponsales de *El Tiempo* y *La Prensa*” (*El Tiempo*, 20-IV-1897)

<sup>10260</sup> La gran marcha de resistencia, que según reportaje proyecta el general Campos, para dar término a las maniobras de los movilizados en Curumalán, el periódico *El Diario* creía “...que no pase de ser un buen deseo, impracticable, porque las disposiciones de la ley de organización del ejército y guardia nacional no son compatibles con la prolongación del servicio militar por 30 días mas, que serán los necesarios, según el general Campos, para llegar hasta las cercanías de la capital. En efecto, la ley establece en su art. 6º que los ciudadanos de 20 años no podrán ser movilizados por un término mayor de 60 días y si estos son los que permanecerán en el campamento de Curumalán, recibiendo instrucción militar, el P.E. tendrá la obligación legal de licenciarlos inmediatamente después de transcurridos” (*El Diario*, sábado 25 de abril de 1896).

<sup>10261</sup> Proyectos de reforma militar (*El Municipio*-16-IX-1892-p.1-col.1)

<sup>10262</sup> Proyectos de reforma militar (*El Municipio*-16-IX-1892-p.1-col.1)

<sup>10263</sup> Ecos del Día-La Organización Militar (*El Diario*-17-VIII-1901), reproducido íntegro en el Apéndice M-XIV. Sobre la instauración del servicio militar obligatorio, ver Rouquié, 1984, 108-113.

<sup>10264</sup> Ecos del Día-La Organización Militar (*El Diario*-17-VIII-1901), reproducido íntegro en el Apéndice M-XIV.

<sup>10265</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, *El Tiempo*, 28-II-1898

<sup>10266</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, *El Tiempo*, 28-II-1898

---

<sup>10267</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10268</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10269</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10270</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10271</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10272</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10273</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10274</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10275</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10276</sup> Fuente: Servicio Militar obligatorio. Necesidad de su implantación. Deficiencias del Enganche, por Paracao, El Tiempo, 28-II-1898

<sup>10277</sup> Fuente: Servicio Militar Obligatorio, El Tiempo, 22-IX-1897

<sup>10278</sup> Fuente: Servicio Militar Obligatorio, El Tiempo, 22-IX-1897

<sup>10279</sup> Fuente: Servicio Militar Obligatorio, El Tiempo, 22-IX-1897

<sup>10280</sup> Fuente: Servicio Militar Obligatorio, El Tiempo, 22-IX-1897

<sup>10281</sup> Fuente: Servicio Militar Obligatorio, El Tiempo, 22-IX-1897

<sup>10282</sup> Sobre el apoyo de la colectividad italiana a la Revolución expresado en la marcha del 10 de agosto de 1890 en homenaje a Alem, ver Gandolfo, 1991, 39.

<sup>10283</sup> Ver Mendiá, 1890, 163, citado en Becerra, 1957, 53; y este último citado a su vez en Ratzer, 1969, 56.

<sup>10284</sup> Belloni, 1975, 220; y sobre la agitación laboral en 1895, ver Zaragoza, 1996, 218-219.

<sup>10285</sup> Datos tomados del diario **La Prensa**, y procesados en la Tabla 1, publicada en Korzeniewicz, 1989, 75.

<sup>10286</sup> Johnson, 1966, 84.

<sup>10287</sup> AGE, Leg.7477.

---

<sup>10288</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en el Apéndice M-VIII).

<sup>10289</sup> AGE, Leg.4387.

<sup>10290</sup> Potash, 1971, 61, nota 14; y Rouquié, 1981, I, 94-100

<sup>10291</sup> Enredo político (*El Municipio*-5-II-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice N-X.-

<sup>10292</sup> Enredo político (*El Municipio*-5-II-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice N-X.-

<sup>10293</sup> Enredo político (*El Municipio*-5-II-1892), reproducido en forma íntegra en el Apéndice N-X.-

<sup>10294</sup> En enero de 1895 se encuentran con mando de fuerza, en ingenieros 5 jefes, en artillería 18, 29 en la infantería, y 25 en caballería, que alcanzan un total de 77 entre coroneles, tenientes coroneles y mayores. Descontando estos últimos del total de jefes que asciende a seiscientos cuarenta y uno, quedan sin colocación en las filas, salvo error u omisión, quinientos sesenta y cuatro para ser distribuidos en las reparticiones militares. El número de estos excede a los puestos que asigna el presupuesto de guerra y no han de encontrarse tan mal paradas nuestras finanzas cuando se recarga la administración con sueldos abonados a ciudadanos para desempeñar empleos que por su naturaleza corresponden a jefes del ejército (*El Tiempo*, 4 de enero de 1895)

<sup>10295</sup> Un serio peligro (*El Municipio*, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1), reproducido íntegro en el Apéndice M-III.

<sup>10296</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10297</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10298</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10299</sup> Scobie, 1964, 276, citado en Ramírez, 1987, 119-120; y Ramírez, 1987, 142. El efectivo del ejército en lo que va del corriente año [1896] es de: 782 jefes, 59 mas de los que asigna el presupuesto; 927 oficiales, 125 mas de los que da el presupuesto; y 10.404 hombres de tropa, 3373 menos de lo que se fija por presupuesto. La proporción en que están los jefes y oficiales con respecto al número de tropa, es de un jefe u oficial por cada 7 soldados. Esto es, dice la memoria, sencillamente absurdo. La ley de retiro, no da resultados eficientes. Hay que reformarla para que pueda desaparecer el recargo de jefes en las planas mayores, y poder renovar los cuadros de oficiales de acuerdo con las necesidades del ejército (*El Diario*, 15-IX-1896)

<sup>10300</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10301</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10302</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.

<sup>10303</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.

<sup>10304</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.

<sup>10305</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.

<sup>10306</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.

- 
- <sup>10307</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10308</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10309</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10310</sup> García Enciso, 1970, 223-224 y 236; y Rouquié, 1981, I, 86.
- <sup>10311</sup> Cuestiones Militares por X (*El Diario*, 22-XI-1902), reproducido íntegro en el Apéndice N-III.
- <sup>10312</sup> Cuestiones Militares por X (*El Diario*, 22-XI-1902), reproducido íntegro en el Apéndice N-III.
- <sup>10313</sup> Cuestiones Militares por X (*El Diario*, 22-XI-1902), reproducido íntegro en el Apéndice N-III.
- <sup>10314</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10315</sup> El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo, *El Diario*-24-I-1901, reproducido íntegro en el Apéndice N-I.
- <sup>10316</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10317</sup> El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (*El Diario*-19 y 20-II-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-II.
- <sup>10318</sup> AGE, Leg.3220, fs.16.
- <sup>10319</sup> Ese fue el caso del Teniente Coronel retirado Alfredo Cordero, que había desempeñado el cargo de Jefe de Policía de la Intervención en el Chaco. Sin embargo, el Auditor General Eliseo Domínguez dictamina que el propósito de la Ley y la intención del legislador al dictarla "...excluían a los retirados de este beneficio, dado que para ellos el hecho de desempeñar cargos civiles no modificaba en lo más mínimo su situación y en consecuencia no precisaban la ley dictada. La discusión en el Congreso de esa Ley lo demuestra acabadamente, siendo de notar que la Suprema Corte ha establecido reiteradamente que las explicaciones o informes vertidos en la discusión de la ley constituyen una fuente propia de interpretación (AGE, Leg.320, fs.17).
- <sup>10320</sup> Ecos del Día-La Nación Desarmada-Males de Raíz y de las Ramas (El Diario-27-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-IV
- <sup>10321</sup> Ecos del Día-La Nación Desarmada-Males de Raíz y de las Ramas (*El Diario*-27-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-IV
- <sup>10322</sup> Ecos del Día-La Nación Desarmada-Males de Raíz y de las Ramas (*El Diario*-27-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-IV
- <sup>10323</sup> La Reforma Militar-Dignidad de la vida militar (*El Diario*—29-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-V.
- <sup>10324</sup> La Reforma Militar-Dignidad de la vida militar (*El Diario*—29-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-V.

- 
- <sup>10325</sup> La Reforma Militar-Dignidad de la vida militar (*El Diario*—29-III-1901), reproducido íntegro en el Apéndice N-V.
- <sup>10326</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10327</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10328</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10329</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10330</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10331</sup> *La Prensa*, 16-III-1905, p.7, columnas 6 y 7.
- <sup>10332</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10333</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10334</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10335</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10336</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10337</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10338</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10339</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10340</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10341</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10342</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10343</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.
- <sup>10344</sup> Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (*La Prensa*, sábado 9-III-1907), reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-II.

- 
- <sup>10345</sup> Ramírez, 1987, 130.
- <sup>10346</sup> Jefe de División Coronel Carlos R. Sarmiento al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Capital Federal, Noviembre 26 de 1906 s/Proyecto de línea de fortines (AGE, Leg.9128), reproducido entero en el Apéndice K-III.
- <sup>10347</sup> Jefe de División Coronel Carlos R. Sarmiento al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Capital Federal, Noviembre 26 de 1906 s/Proyecto de línea de fortines (AGE, Leg.9128), reproducido entero en el Apéndice B-XIX.
- <sup>10348</sup> AGE, Leg.12.343, fs.358.
- <sup>10349</sup> Rouquié, 1981, I, 134.
- <sup>10350</sup> Castro Solano, 2005, 23. Para la importancia de las esposas de jefes y oficiales en cuanto a elevación de status y a infundirles a sus maridos un espíritu más conservador, ver la observación de Juan F. Marsal, reproducida en Cantón, 1971, 121, nota 40. Asimismo, es de destacar el poder matriarcal de las esposas de oficiales, aprovechando el impedimento de ascender de los militares separados o divorciados. Ver también el caso del Teniente 1º Arturo Orfila en el Apéndice N-XI.
- <sup>10351</sup> AGE, Leg.10.455-Foja de servicios del Mayor León D. Quaglia.
- <sup>10352</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI. Vallee estaba casado con María Meyer Pellegrini, sobrina del exPresidente Carlos Pellegrini. El Gral. Tomás Vallée era hermano del Mayor Santiago Vallée.
- <sup>10353</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10354</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10355</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10356</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10357</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10358</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10359</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10360</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10361</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10362</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI

- 
- <sup>10363</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10364</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10365</sup> Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). reproducido completo en Apéndice N-VI
- <sup>10366</sup> Mann, 1997, II, 555.
- <sup>10367</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10368</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10369</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10370</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10371</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10372</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10373</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10374</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10375</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10376</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10377</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10378</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10379</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10380</sup> Ascensos Militares. Distinciones y Preferencias Odiosas (**El Municipio**, 25-X-1894)
- <sup>10381</sup> En el caso del Coronel Mariano Espina, fue condenado a muerte, y luego le fue conmutada la pena (ver AGE, Leg.4226; Etchepareborda, 1968, 233; y reportaje al Coronel Espina en *Crítica*, 3-XI-1925, p.9 y 10; 4-XI-1925, p.9; y 5-XI-1925, p.9).
- <sup>10382</sup> Así, se afirmaba que entre los ascendidos "...figuran un jefe que revista como presente en la línea militar del Río Negro, pero que desde mucho tiempo atrás se encuentra en Entre Ríos ocupado en sus

---

propios asuntos de campo; dos o tres inválidos y hasta un oficial que en 1890 fue dado de baja por actos desdorados y fraudes, según las palabras textuales de la resolución respectiva. ¿Es el Estado Mayor el que ha cometido estos errores? ¿o son el Presidente y su Ministro de la Guerra los únicos responsables? Como quiera que sea, deben ponerse en claro las denuncias que se hacen y si efectivamente hay ascensos indebidos dejarlos sin efecto, con lo que se evitarán males que nunca se lamentarán demasiado si llegan a realizarse (*El Tiempo*, 20 de abril de 1895)

<sup>10383</sup> Reynolds, 1930, 11, citado en Rouquié, 1981, I, 134.

<sup>10384</sup> ver Lista L-IV. Sobre el proyecto de ley de resarcimiento a los oficiales cuya carrera quedó trunca con motivo de su participación en las revoluciones de 1890, 1893 y 1905, ver Orona, 1966; Cantón, 1971, 125, nota 48; y Rouquié, 1986, I, 156.

<sup>10385</sup> ver el caso del Teniente 1°. Nolasco Ustáriz en la Revolución de 1905 (AGE, Leg.292 o Leg.14.400).

<sup>10386</sup> Rouquié, 1981, I, 156.

<sup>10387</sup> Resolución del 5 de septiembre de 1890 disponiendo revisten en la forma que se expresa los Jefes y Oficiales que vuelven al Ejército en virtud de la Ley de Amnistía General (Colección Domínguez, n.3-4, ítem 2328, pp.395-398).

<sup>10388</sup> El Capitán Vicente Ruberti alega para acogerse a la Ley 11.268, que en 1892 fue procesado por cuanto con el empleo de Cabo 1° actuó en la Conspiración de Santa Catalina (AGE, Leg.316, fs.25). Los monitores eran buques artillados y con espolones de acero, pero que para ese entonces habían perdido importancia con el la modernización de la artillería, pues no podían hacer puntería elevada (*Sud- América*, 2-VIII-1891, año VIII, n.2211).

<sup>10389</sup> Cambiasso estaba casado con Delia Machiavello, y fue padre de tres hijos, Raúl Héctor, Jorge Francisco y Clementina, mujer de Emilio Delfau, con el cual tuvo dos hijos. Falleció en 1939 (AGE-Leg.2442). Lamentablemente no he podido aún ubicar a ninguno de sus descendientes. El caso del Mayor Emilio de Ipola y sus ácidas ironías respecto a sus condiciones guerreras se transcribe en el Apéndice N-IX, y el del General Isidro Arroyo en el Apéndice L-IV. Ipola figura preso junto con el coronel Pedro Toscazo, y el Teniente Coronel Ramón de Olmos (AGE-Expedientes de Valor Histórico 45481-Caja 469-5377). De Ipola era ahijado del Ministro de Guerra Julio Moreno.

<sup>10390</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.

<sup>10391</sup> Acta de Investigación sobre la actuación de Baldomero Álvarez en la Revolución de 1893 (Fuente: AGE, Leg.532), reproducido completo en Apéndice G-I.

<sup>10392</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice N-I

<sup>10393</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice O-I

- 
- <sup>10394</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto de su actuación en la Revolución de 1893 (AGE, Leg.8213) reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10395</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10396</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10397</sup> Mayor Juan A. Cambiasso, s/prisión en el monitor Los Andes (El Diario, martes, 26-VII-1892, p.1), reproducido completo en Apéndice N-VII.
- <sup>10398</sup> Mayor Juan A. Cambiasso, s/prisión en el monitor Los Andes (El Diario, martes, 26-VII-1892, p.1), reproducido completo en Apéndice N-VII.
- <sup>10399</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10400</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10401</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII. Lamentablemente no me ha sido posible identificar la fecha en que fue publicada dicha carta abierta.
- <sup>10402</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10403</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10404</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10405</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10406</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10407</sup> Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442), reproducido completo en Apéndice N-VIII.
- <sup>10408</sup> Para los 550 decretos y 1879 resoluciones ministeriales firmadas por el Ministro de Guerra entre 1928 y 1930, ver Gasió, 2005, 166 y 168.
- <sup>10409</sup> AGE, Leg.6855. Jóvenes Turcos también eran denominados en Francia aquellos oficiales de la Armada que liderados por el Coronel Grandmaison (discípulo de Ferdinand Foch) se oponían al General Victor-Constant Michel y sus contactos con los pacifistas de Jean Jaurés (Possony, 1968b, 152).
- <sup>10410</sup> Asuntos Militares, **La Prensa**, 24-II-1928, 27-X-1928, 4-XII-1928, 24-II-1929, 18-V-1929, y 18-III-1930, citadas en Potash, 1971, 61, nota 14.

- 
- 10411 *El Diario*, 7-VIII-1896.
- 10412 *El Diario*, 7-VIII-1896.
- 10413 *El Diario*, 10-IV-1896.
- 10414 *El Diario*, 7-VIII-1896.
- 10415 *El Diario*, 7-VIII-1896.
- 10416 *El Diario*, 28 y 29-VIII-1898.
- 10417 *El Diario*, 28 y 29-VIII-1898.
- 10418 *El Diario*, 28 y 29-VIII-1898.
- 10419 La iniciativa del jefe del regimiento 4º de artillería, instalando en el campamento de Villa Mercedes una escuela de primeras letras para los niños del cuerpo, es digna de elogio y aplauso. Fuente: Los Niños del Campamento, *El Tiempo*, 25-XI-1897
- 10420 La comandancia de la división de Cuyo se preocupa en disminuir el número de mujeres que hay en los cuerpos de esa unidad, especialmente en los que acampan en San Rafael (Mendoza). Fuente: MILITARES-Mujeres, *El Tiempo*, 31-XII-1897.
- 10421 El telegrama que inserta el periódico *El Tiempo* "...da a conocer el número excesivo de familias que han acompañado a los movilizados de 20 años. Acertadamente y en cumplimiento de la ley, el intendente Acosta ordenó ayer que no se racionará a las cien familias de las que hace mención el telegrama de la referencia y sí a los 30 pertenecientes a la tropa de línea que hace tiempo está en Río IV" (*El Tiempo*, 21 de abril de 1896)
- 10422 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10423 *El Tiempo*, 19, 20, 21 y 23 de diciembre de 1895.
- 10424 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10425 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10426 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10427 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10428 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896
- 10429 Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de

---

enero de 1896

<sup>10430</sup> Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896

<sup>10431</sup> Fuente: Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. Miserias, por J. J. Biedma, *El Tiempo*, 17 de enero de 1896

<sup>10432</sup> Bosoer, 2005, 52-53. Para una historia de las diplomacias paralelas en la Argentina, ver Bosoer, 2005.

<sup>10433</sup> Ver Squire, 1968; y Caffentzis, 2002, 216 y 218. Sobre el enemigo interno, ver Esposito, 1996, 156. Para la creación, evolución e influencias experimentadas por la división Informaciones del Estado Mayor General del Ejército, ver Toyos, 2005.

<sup>10434</sup> Kohen, 1983, 79.

<sup>10435</sup> Imaz, 1964, 52-53, citado en Leguizamón, 1999, 129.

<sup>10436</sup> (artículos 5º y 6º de las obligaciones del jefe del Estado Mayor).

<sup>10437</sup> Los sargentos Avelino Miranda y N. Pérez sirvieron de espías del Ejército de Buenos Aires, al mando del General José Inocencio Arias, para lo cual hicieron trabajos de inteligencia en el Ejército Nacional que lideraba el Presidente Nicolás Avellaneda (Gutiérrez, 1959, 244-248).

<sup>10438</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I. El rol de la prensa diaria fue determinante para el estallido de la revolución y también para el procesamiento del duelo que siguió a su derrota militar. Para Mendía, el periódico que más contribuyó con la revolución fue *El Diario*, dirigido por Manuel Láinez (Mendía, 1890, I, 18, 53 y 73). En su comité de redacción se destacaba el género del periodismo de opinión, y la mayoría de sus autores firmaba con seudónimo. Quienes firmaban estos escritos con seudónimos tenían fuertes razones para hacerlo. Lamentablemente, los diferentes trabajos que revelaban la identidad de los seudónimos de ese entonces, como los de Cutolo (1962) y los de Tesler (1991), ignoran los casos producidos en el periódico de Láinez. Para desentrañar su identidad, tuve que ir descartando posibles autores, hasta concluir que necesariamente se trataba de un militar. Entre los militares con dotes narrativas encontré a varios, entre ellos a José M. Castro Sundblad, Luis Yrurtia y Diego Lamas. Pero de todos ellos, quien mas necesitaba firmar con seudónimo era Lamas, precisamente por ser Oriental y haber alcanzado el grado de Mayor en el Ejército Argentino. Sobre el Mayor Diego Luis Lamas, ver Apéndice C-XXIV y Mendía, 1890, 14, 21, 25 y 36. Lamas era hijo del General Diego Eugenio Lamas y nieto materno del partidario de Oribe, General Manuel Delgado. No tenía parentesco alguno con Andrés Lamas. Debo concluir entonces mis serias sospechas que todos los sesudos escritos publicados en los periódicos *Sud-América*, de José Gil, y *El Diario*, de Manuel Láinez, referidos a cuestiones militares y firmados con distintos seudónimos (Grapho, Ralf, X, Yaro, etc.), son obra de este genial militar Oriental, o en su defecto por José M. Castro Sundblad..

<sup>10439</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I

<sup>10440</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I

- 
- <sup>10441</sup> Por lo visto Molina ignoraba que Conesa –pese a su lealtad revolucionaria-- era también alcohólico, como lo revela su propia foja de servicios (AGE, Leg.3182).
- <sup>10442</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10443</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10444</sup> Sánchez-Parga, 2005, 72.
- <sup>10445</sup> Correspondencia del Subteniente Manuel Estol a propósito de la Conspiración de 1904, en Río Cuarto el 26-X-1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.286), reproducido completo en el Apéndice O-III.
- <sup>10446</sup> Caras y Caretas, 11 de febrero de 1905.
- <sup>10447</sup> Sobre la Revolución Radical de 1933 en Paso de los Libres (Corrientes), ver Villalba, 1993. Entre los casos de persecución por organismos de inteligencia se destaca el del Cap. José María Frontera, oficial argentino veterano de la Guerra Civil española en el bando republicano, acusado de conspirar para la rebelión y de sustrarse al servicio recurriendo para ello a ocultaciones y engaños fraudulentos. La conspiración para la rebelión "...se halla abonada con una serie de indicios graves y concordantes como la profesión de ideas y principios francamente anárquicos,...su trato con personas de reconocida actividad revolucionaria [Julio R.Barcos], al punto de ser vigilado por la Policía como elemento de desorden, el abandono de destino cometido en circunstancias en que se preparan en la Capital hechos subversivos y de intimidación pública, en compañía de cuyos organizadores es detenido por la policía" (AGE-Leg.45.504. Auditoría General de Guerra y Marina, Dictámen No.72.829).
- <sup>10448</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.
- <sup>10449</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10450</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10451</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10452</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10453</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-

- 
- <sup>10454</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10455</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10456</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10457</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10458</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10459</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10460</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10461</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10462</sup> Rouquié, 1981, I, 266.
- <sup>10463</sup> Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-Leg.45.500), reproducido completo en Apéndice O-X.-
- <sup>10464</sup> La defensa nacional (*El Municipio*-27-VII-1892-p.1-col-1), corresponde O-XII.-
- <sup>10465</sup> La defensa nacional (*El Municipio*-27-VII-1892-p.1-col-1), corresponde O-XII.-
- <sup>10466</sup> La renuncia de Levalle (*El Municipio*-30-I-1891, p.1-col-1), reproducida en forma íntegra en el Apéndice O-XIII.
- <sup>10467</sup> La renuncia de Levalle (*El Municipio*-30-I-1891, p.1-col-1), reproducida en forma íntegra en el Apéndice O-XIII.
- <sup>10468</sup> La renuncia de Levalle (*El Municipio*-30-I-1891, p.1-col-1), reproducida en forma íntegra en el Apéndice O-XIII.
- <sup>10469</sup> Mendiá, 1890, II, 23; y Etchepareborda, 1968, 63. Sobre los confidentes en las conspiraciones revolucionarias, ver Benjamín, 2005, 617-633. Palma prestó 25 años de servicios, la mayor parte en el Regimiento 11 de Caballería, y estaba casado con Gabriela Garaita. Fue alumno en la Escuela de Palermo y se lo dio de baja a pedido de su madre el 22 de Junio de 1867, dos años antes de su

---

fundación (AGE-Leg.9561) .

- <sup>10470</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10471</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10472</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10473</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10474</sup> Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 1892. (AGE, Leg.8213), reproducido completo en Apéndice O-I
- <sup>10475</sup> Sobre las repercusiones políticas de la Conspiración de Santa Catalina, ver el editorial de ***La Prensa*** titulado ¿Qué es lo que hay? (***La Prensa***, 23-IX-1892, p.4), reproducido en el Apéndice F-VI.-
- <sup>10476</sup> AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV. Calvete era hijo del Coronel Benjamín Calvete, muerto en la acción de La Verde en 1874, y marido de Mercedes Gache (Mármol, 1876, capítulo X). La vocación militar como resultado de la custodia de una memoria histórica no ha sido nueva en la historia argentina. Ver los casos del Capitán Juan Bautista Barquiza, hijo del Jefe del Regimiento de Blandengues Teniente Coronel Cosme Guillermo Barquiza, muerto por orden de Rosas en 1828 por pertenecer al partido unitario (AGE-Leg.1408, fojas 4); y el caso del Mayor Estéban García, hijo del benemérito Coronel D. Estéban García, uno de los 152 voluntarios con que el General Juan Lavalle comenzó su Cruzada Libertadora, batiéndose en Don Cristóbal, Quebracho Herrado y Famaillá, y "...uno de los 178 fieles que salvaron el cadáver de su General, muerto en Jujuy el 9 de Octubre de 1841, defendiéndolo durante muchas jornadas y en el espacio de sesenta leguas de la persecución de sus adversarios, hasta dejarlo depositado en tierra boliviana" (AGE-Leg.5116). Para el óleo de Nicanor Blanes sobre la conducción del cadáver de Lavalle en la Quebrada de Humahuaca, ver Rodríguez y Ruffo, 2002.
- <sup>10477</sup> Meses después, en febrero de 1905, las delaciones estuvieron a la orden del día (Etchepareborda, 1968, 252) .
- <sup>10478</sup> Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV)
- <sup>10479</sup> Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV)
- <sup>10480</sup> Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV)

- 
- <sup>10481</sup> Sobre casinos y viviendas militares, ver Rattenbach, 1958, 153-154.
- <sup>10482</sup> La Reforma Militar-Dignidad de la vida militar (*El Diario*—29-III-1901),
- <sup>10483</sup> Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV)
- <sup>10484</sup> Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, reproducido completo en Apéndice O-IV)
- <sup>10485</sup> Declaración del testigo Subteniente Arturo Capurro Robles de 9-X-1904, a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.96, reproducido completo en Apéndice O-II)
- <sup>10486</sup> Declaración del testigo Subteniente Armando Gordillo de 9-X-1904, a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.93, reproducido completo en Apéndice O-II)
- <sup>10487</sup> Declaración del testigo Subteniente Armando Gordillo de 9-X-1904, a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.93, reproducido completo en Apéndice O-II)
- <sup>10488</sup> Declaración del testigo Subteniente Armando Gordillo de 9-X-1904, a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.93, reproducido completo en Apéndice O-II)
- <sup>10489</sup> El General Vallée explica el porqué de su retiro, *La Nación*, 11-I-1921, p.7.
- <sup>10490</sup> Declaración del testigo Subteniente Arturo Capurro Robles de 9-X-1904, a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.96, reproducido completo en Apéndice O-II). Sobre la deliberación política de los militares Chilenos en el preludio de la Guerra Civil de 1891, ver San Francisco, 2005.
- <sup>10491</sup> Para un examen de la discursividad yrigoyenista, ver Padoan, 2002.
- <sup>10492</sup> Los Radicales, *La Vanguardia*, miércoles 14-X-1908.
- <sup>10493</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V).
- <sup>10494</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V).
- <sup>10495</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V). Apparently, el Comandante Daniel Fernández se recuperó de sus heridas, pues cinco años más tarde se lo encuentra entre los participantes de un banquete ofrecido en París al General von der Goltz (Notas Sociales, *La Nación*, 11-V-1910, citado en Cantón, 1971, 106, nota 23.
- <sup>10496</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg. 4623,

---

reproducido completo en Apéndice O-V). El Mayor Estéban García se había destacado en la Revolución del 90, conjuntamente con el Capitán José M. Castro Sundblad, como uno de los jóvenes oficiales que articuló el levantamiento de las unidades revolucionarias. Daniel Fernández pudo escapar herido a la Banda Oriental disfrazado de monje (Etchepareborda, 1968, 283)

<sup>10497</sup> Gondra, 1945, 66.

<sup>10498</sup> Gondra, 1945, 66.

<sup>10499</sup> Sobre la actuación del mayor Estéban García, ver Etchepareborda, 1968, 279.

<sup>10500</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V)

<sup>10501</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V)

<sup>10502</sup> T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg. 4623, reproducido completo en Apéndice O-V)

<sup>10503</sup> Declaración del Coronel Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-XI).

<sup>10504</sup> Exposición del Jefe de Policía de la Capital publicada en **La Nación** y **La Prensa** el 10 de febrero de 1905

<sup>10505</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10506</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10507</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10508</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10509</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10510</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10511</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10512</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

<sup>10513</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).

- 
- <sup>10514</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).
- <sup>10515</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).
- <sup>10516</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).
- <sup>10517</sup> Declaración del Cnel. Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859, reproducido completo en Apéndice O-VIII).
- <sup>10518</sup> Ver Listado O-VI.
- <sup>10519</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro de Guerra, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido íntegro en el Apéndice O-IX.
- <sup>10520</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro de Guerra, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido íntegro en el Apéndice O-IX.
- <sup>10521</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro de Guerra, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido íntegro en el Apéndice O-IX.
- <sup>10522</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido completo en el Apéndice O-IX.
- <sup>10523</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido completo en el Apéndice O-IX.
- <sup>10524</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido completo en el Apéndice O-IX.
- <sup>10525</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido completo en el Apéndice O-IX.
- <sup>10526</sup> Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118), reproducido completo en el Apéndice O-IX.
- <sup>10527</sup> Teniente 1º Arturo Orfila al Ministro de Guerra s/postergaciones en ascensos y castigo en destinos (AGE-Leg.295), reproducido completo en el Apéndice O-XI.
- <sup>10528</sup> Teniente 1º Arturo Orfila al Ministro de Guerra s/postergaciones en ascensos y castigo en destinos (AGE-Leg.295), reproducido completo en el Apéndice O-XI.
- <sup>10529</sup> Taylor, 2000, 261.
- <sup>10530</sup> Audi, 1989, 291-292; y Goodman, 1992, 4-7.

---

<sup>10531</sup> Etzioni-Halevy, 1994, 478.

<sup>10532</sup> Galston, 1991, 217 y 244; y Macedo, 1990, 138-139; citados en Kymlica y Norman, 1996, 89.

<sup>10533</sup> cables de prensa, fallos judiciales, manuales educativos, partes militares, debates parlamentarios, textos telegráficos, memorias bancarias, sermones y homilias religiosos, etc.

<sup>10534</sup> "...las sesiones ordinarias de las Legislaturas duraban unos escasos tres meses, no podían prorrogarse por sí mismas, ni reunirse en extraordinarias, ni tampoco podían iniciar sus sesiones sin previa convocatoria del Poder Ejecutivo" (Lisandro de la Torre, Congreso Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, 18-I-1923, Reunión No.55, p.522). Sin embargo, en lo que hace al Poder Judicial, de acuerdo a las teorías de Bickel (1986), los jueces de las Cortes Supremas, cuya selección no proviene del pueblo, y cuyos mandatos no están sujetos al escrutinio público, tienen a través del control de constitucionalidad, "...la atribución de revertir decisiones de los otros dos poderes que dependen para su constitución de la voluntad mayoritaria" (Bickel, 1986, citado en Smulovitz, 1996, 182).

<sup>10535</sup> Lisandro de la Torre, Congreso Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, 18-I-1923, Reunión No.55, p.522.

<sup>10536</sup> El mismo fenómeno se dió en el Perú a mediados del siglo pasado, ver Peloso, 1996, 188.

<sup>10537</sup> Botana (1977) trata extensamente en su capítulo IV el desempeño de las Juntas de Electores, pero reduce su estudio a la Junta Electoral nacional, subestimando el rol que tuvieron las Juntas de Electores provinciales (Botana, 1977, 92-98).

<sup>10538</sup> Díaz Melián, 1966, 188.

<sup>10539</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, San Juan, 10-VII-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>10540</sup> Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115].

<sup>10541</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, San Juan, 10-VII-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>10542</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, San Juan, 10-VII-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>10543</sup> Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 10-VII-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>10544</sup> marido de Justina Gil Merlo, hermana del Gobernador Anacleto Gil Merlo, y de la mujer del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín Toranzos (DN.1882-92); y padres de Vicente Mallea Gil, Ministro de Gobierno de Juan Maurín en 1935 (Videla, 1990, VI, 940).

<sup>10545</sup> Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 10-VII-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>10546</sup> Páez de la Torre, 1987, 562-563. La Constitución de Tucumán, una de las últimas en ser sancionada, en 1856, con conocimiento de los textos anteriores, dice en su art. 20, inc.12, que son atribuciones de la Legislatura: "examinar y proclamar las elecciones de sus miembros y las de los Diputados nacionales de parte de la Provincia interin el Congreso legisla sobre el particular" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible sin mengua de la dignidad y del decoro que el Gobierno reconozca una Legislatura con Diputados que no han sido elegidos por el pueblo de los Departamentos (Ibídem). Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,

"...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

---

<sup>10547</sup> Dana Montaña, 1961, 48.

<sup>10548</sup> Matienzo, 1926, 328.

<sup>10549</sup> Matienzo, 1926, 328.

<sup>10550</sup> Delfin Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.100. Pepe Posse observaba, combatiendo la doctrina constitucional establecida por Sarmiento en el caso de Jujuy, por la cual se le otorgaba a la Legislatura o Sala de Representantes facultades de Juez de los legisladores electos, que la Constitución de Tucumán no había concedido ni dado dichas facultades, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo objeto a los Diputados Nacionales. La razón que tuvieron los constituyentes para no darles a la Legislatura atribuciones judiciales se explicaba y se justificaba

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus miembros" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

Preferible debía ser y era "...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad de sus actos" (Ibidem). Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad, y arbitrariedad de la Sala era, para Posse "...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías" (Ibidem). Aquí es ocasión de repetir las doctrinas que Posse venía sosteniendo en la prensa:

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, porque la elección es un acto indivisible" (Ibidem).

La Constitución de Mendoza decía en su art.2, inc.1 que la Legislatura habrá de "Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus miembros" (José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Atribución explícita que constituía a la Legislatura en juez inapelable. Con las mismas palabras como si se hubiesen copiado las unas a las otras, se encuentra ese artículo en las Constituciones de las siguientes provincias: La Rioja, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fé, San Juan, y Corrientes. La Constitución de Córdoba difería de las anteriores en estos términos "La Asamblea será juez en la comprobación de los poderes de sus Diputados". La de Santiago del Estero atribuye a una Comisión de la Sala en receso esta facultad: "Recibir los Diputados electos haciendo el escrutinio de las actas de la elección" (José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Estas Constituciones daban a la Legislatura facultades más amplias, invasoras del Poder Judicial, por que expresamente le confiere la facultad para resolver sobre la validez o nulidad de los títulos de sus miembros, pero aún esta facultad tan amplia como peligrosa suponía la salvación de las mayorías, para no alterar la forma republicana de gobierno (Silvano Bores a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>10551</sup> Delfin Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.100.

<sup>10552</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>10553</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>10554</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>10555</sup> art.64 y 91 de la CN.

<sup>10556</sup> Zimmermann, 1994, 5.

---

<sup>10557</sup> ver Lo Prete (1994). Según Lo Prete, Hamilton elaboró la teoría de las incompatibilidades (Lo Prete, 1994, 23). En efecto, con el fin de garantizar la división de poderes, esencial para la conservación de la libertad, Hamilton señalaba que "...es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, requeriría que todos los nombramientos para las magistraturas supremas, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o sea del pueblo, por conductos que fueran absolutamente independientes entre sí" (Hamilton, et. al., 1780, 1943, 1987, 1994, 220).

<sup>10558</sup> tales como Bañados Espinosa (1888), Micell (1902), González Calderón (1909, 1931), Montes de Oca (1910), Roldán (1917), Bas (1927) y Barthélemy (1939).

<sup>10559</sup> La Constitución de Mendoza en el capítulo referente a las atribuciones del Poder Legislativo dice en su art.2, inc.1: "Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus miembros" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). La Constitución de Córdoba difiere de las anteriores en estos términos "La Asamblea será juez en la comprobación de los poderes de sus Diputados" (Ibídem). La de Santiago del Estero atribuye a una Comisión de la Sala en receso esta facultad "Recibir los Diputados electos haciendo el escrutinio de las actas de la elección" (Ibídem).

<sup>10560</sup> Silvano Bores a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). A propósito de la superposición de las funciones legislativas y judiciales, desde Tucumán, Pepe Posse, (a) "El Doctor Amoníaco", llegó a recomendarle a Roca que leyera un artículo periodístico suyo, en donde caracterizaba a dicha superposición como "...un Poder Público metido o embutido dentro de otro Poder" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>10561</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

<sup>10562</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

<sup>10563</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34); reproducida parcialmente en Rafael, 1982, 56.

<sup>10564</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 18-VIII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, IEG.15.

<sup>10565</sup> Compilación de Leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba desde 1810 a 1870 (Córdoba),..., t.I, 188-189, citado en Pavoni, 1993, 167.

<sup>10566</sup> luego de la Reforma Constitucional de 1861 se transformó en el art.64.

<sup>10567</sup> Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 18 Sesión Ordinaria, 7-VII-1857, p.103; y 30 Sesión Ordinaria, 29-VII-1857, p.147-154. Ver asimismo, Pellet Lastra, 1995, 104-105. Diez años más tarde, en 1867, se consideró el proyecto del Senador Martín Piñero (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 18-VI-1867). Quince años después, en 1882, el Diputado Abel Ortiz presentó un proyecto por el cual ningún miembro de los tres Poderes podrá tener participación en contratos con la Nación (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1882, t.I, p.772). Otros diez años después, en 1891, el Diputado Nacional Salvador Maciá debió dejar su banca por asumir el Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 24-VII-1891, 21 Sesión Ordinaria, p.369).

<sup>10568</sup> Barraquero, 1926, 427.

<sup>10569</sup> *La Nación* (Buenos Aires), 9-X-1898.

<sup>10570</sup> Linares Quintana, 1942, II, 377.

---

<sup>10571</sup> Francisco Olivera a J. Roca, Santiago del Estero, 13-II-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21).

<sup>10572</sup> artículos 28 y 29.

<sup>10573</sup> El Senador Nacional Rafael Igarzábal manifestó en el Senado que "...fueron elegidos electores los empleados del Poder Ejecutivo, Diputados a la Legislatura, individuos que no tenían la edad marcada por la Constitución, personas que no tenían la renta correspondiente, y hasta se dió por hecha una elección que no había tenido lugar" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.176). En carta a Dardo Rocha, José Bartolomé Arias le relata que en Corrientes, la rebelión es una cuestión social, "...le aseguro que hoy son capaces de levantarse hasta las mujeres y los niños contra el Dr. Derqui, este ha procedido de tal manera que ni con el apoyo de la Nación logrará imponer a este pueblo" (José Bartolomé Arias a D. Rocha, Corrientes, 11-IV-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>10574</sup> *La Nación* (Buenos Aires), 15-X-1898.

<sup>10575</sup> Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 27-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>10576</sup> Guillermo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 28-VII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39).

<sup>10577</sup> Manuel Gorostiaga, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.101.

<sup>10578</sup> Manuel Gorostiaga, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.101.

<sup>10579</sup> Manuel Gorostiaga, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.101.

<sup>10580</sup> En oportunidad de debatirse la incompatibilidad de la Diputación del Dr. José Arce con el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Enrique Dickmann expresaba "...que la organización universitaria de 1886 a 1906, ha sido oligárquica, cerrada; un régimen que muchos jóvenes no conciben ahora. No existía ningún principio democrático en la vida universitaria. Los grupos directivos de aquel entonces se llamaban académicos, eran vitalicios y se elegían entre ellos mismos. Por renuncia o por muerte de un académico, los académicos restantes lo reemplazaban. Era una especie de cónclave de cardenales. Pudo en un comienzo responder a un estado de cultura incipiente, a un estado de desconfianza en la capacidad colectiva de la vida universitaria; pero con el andar del tiempo, aquellos grupos cerrados, oligárquicos, se han convertido en camarillas y hubo necesidad de una verdadera revolución universitaria para acabar con aquel régimen" (Exposición del Diputado Nacional Enrique Dickmann, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.386).

<sup>10581</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 2-VI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31); y Diputado Nacional Enrique Dickmann, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1924, t.V, 382-404; citado en Linares Quintana, 1942, II, 364.

<sup>10582</sup> se opusieron a su licencia los Diputados Nacionales Láinez y Mansilla (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Reunión n.14, del 25-VI-1924, p.739; citado en Linares Quintana, 1942, II, 378). Diez años más tarde, Alcorta es mencionado por Felipe Yofre como que "...quedaba gozando de los dos ministerios del Interior y de Guerra, sin haber cortedad, como en otro tiempo solía disfrutar del rectorado del Colegio, de la cátedra, del directorio del Banco Nacional o de la diputación al Congreso (Felipe Yofre a J. Roca, Berlín, 22-IX-1897, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76). Respecto a las prácticas privadas y económicas de Alcorta, ver Salcedo, 1995.

<sup>10583</sup> Cuando el Senador Nacional Joaquín V. González asumió en 1909 la Presidencia de la Universidad de La Plata nadie planteó la incompatibilidad del cargo que asumía. Recién quince años después, quien aludió a dicha incompatibilidad fué el Diputado Nacional Enrique Dickmann (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.399-400; citado en Linares Quintana, 1942, II, 382 y 386). Al referirse al Senador González, Dickmann aclaraba que el respetaba y admiraba "...la inteligencia superior del ex-Senador y ex-Ministro González. Fué un hombre muy capaz. Pero como en muchos casos de hombres públicos, su mente no iba paralela con su desarrollo ético. En este aspecto no puede ser un ejemplo para la nueva democracia argentina. Podría decir de Joaquín V. González --guardando las distancias con el tiempo y

---

el espacio-- que se parecía a Lord Bacon: gran desarrollo mental y escaso desarrollo ético" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.399)

<sup>10584</sup> Diputados Nacionales Enrique Dickmann y Juan A. González Calderón, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.400-404; citados en Linares Quintana, 1942, II, 382 y 386. Dickmann pretendía que un Rector "...sea inmaculado, sea un hombre equidistante de todos los grupos y de todos los partidos, no sea un hombre militante en ningún bando político y que no pueda ser sospechado en ningún momento de favorecer tal o cual interés de grupo, de partido o de secta" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 25-IV-1924, Reunión n.14, t.I, p.741).

<sup>10585</sup> Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 29-V-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5.

<sup>10586</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 14-III-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba se hallaban acumulados en el Dr. Vieira los ramos de Derecho Internacional y Derecho Constitucional; en el Dr. Telasco Castellanos los de Derecho Natural y Derecho Público Eclesiástico; en el Dr. Soria los de Derecho Administrativo y Estadística; y en el Dr. Nicéforo Castellanos los de Derecho Penal y Derecho Comercial (Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 14-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10587</sup> Abrahám Echazú a Victorino de la Plaza, Salta, 12-III-1880, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 5-1-2).

<sup>10588</sup> "...Quinet, Voltaire, Flamarion, Laboulaye y Chateaubriand o Lamartine ocupan mis horas sustraídas a la política o a la profesión" (Abrahám Echazú a Victorino de la Plaza, Salta, 12-III-1880, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 5-1-2).

<sup>10589</sup> *La Razón* (Tucumán), 13-IV y 22-IV-1877, reproducidos en *La América del Sud* (Buenos Aires), citados en Posse, 1993, 140.

<sup>10590</sup> permítaseme a citar a Saguier, 1995b.

<sup>10591</sup> Duncan, 1980, 778; y Pacheco, 1994, 32.

<sup>10592</sup> Alvarez Prado, 1922, 95. Acerca de los juicios de imprenta en la República Oriental del Uruguay, ver Gómez, II, 186, 218, 260, 287 y 306.

<sup>10593</sup> McEvoy, 1994, 104.

<sup>10594</sup> Eran oficialistas, subvencionados por los gobiernos provinciales, en Salta, *La Reforma* (1875); en Tucumán, *El Telégrafo del Norte* (1872) (García Soriano, 1972, 20); en Catamarca, *La Regeneración*, que respondía en 1862 a la intervención del Dr. Marcos Paz (Galván Moreno, 1944, 330); en Santiago del Estero, El País, órgano del Gobernador Sofanor de la Silva; *El Ferrocarril*, redactado por Federico Alvarez y Ramón Pizarro; y *La Opinión Pública*, órgano del gobierno de Absalón Rojas (Galván Moreno, 1944, 432); en Córdoba, *El Pueblo Soberano*, partidario del gobierno proveniente del movimiento revolucionario que encabezó M. J. Olascoaga (Galván Moreno, 1944, 346); en Corrientes, *La Opinión*, redactada por Vicente G. Quesada; *La Nueva Época* (1861), órgano del gobierno de José Pampín; y *La Unión Argentina* (1861), del gobierno de M. Rolón (Galván Moreno, 1944, 358); en Entre Ríos, *El Constitucional*, y *La Opinión* de Entre Ríos (omitidos por Galván Moreno); en Mendoza, el diario *La Palabra* (fundado en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383); y en San Luis, *El Puntano*, del candidato oficial Juan Llerena; y *El Telégrafo*, defensor del gobierno de Rafael Cortés (Galván Moreno, 1944, 409).

<sup>10595</sup> Director de El País de Santiago del Estero y del Diario Popular de Salta, Inspector General de Escuelas, Gerente del Banco Hipotecario de Santiago del Estero y Presidente del Banco Provincial (Cutolo, III, 410). Era primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz, y marido de una prima hermana de Roca y de Paz, llamada Plácida Figueroa Paz.

<sup>10596</sup> Mariano Gorostiaga a Miguel Juárez Celman, Salta, 18-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003216.

---

<sup>10597</sup> N. Morcillo a J. Roca, Córdoba, 7-VIII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25).

<sup>10598</sup> Luis G. Pinto a J. Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885 y 30-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>10599</sup> Halperín Donghi, 1985, 79.

<sup>10600</sup> Evaristo Moreno a Victorino de la Plaza, Concordia, 17-IX-1883, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.411.

<sup>10601</sup> Paradójicamente, el éxito político-militar que significaron en el siglo veinte los golpes de estado se fundaba, para R. Schiff (1995), la formuladora de la Teoría de la Concordancia, en la abrupta separación de las instituciones civiles respecto de las militares.

<sup>10602</sup> Estrada, 1923 [1877], II, 214; y Montes de Oca, 1910, II, 148-54; citados por Linares Quintana, 1942, II, 36-37.

<sup>10603</sup> Ortega, 1963, 191.

<sup>10604</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. El Gobierno Nacional había reprobado la ejecución de Angel Vicente Peñaloza "ordenada después de su captura", pues nada habrá "...debido ni podido ejercer sobre él las atribuciones y prerrogativas de los Tribunales y del Jefe Supremo del Estado", mandando insertar el 26-XI "esta Resolución en la Orden General del Ejército" (Argentina, Ministerio de Guerra y Marina, Memoria, año 1864, Anexo A, pp.48-52; citado en Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, II, 164).

<sup>10605</sup> nacido en Inglaterra, vino cuando niño junto a su padre Santiago Spencer Wilde, siendo ahijado del Duque de Wellington. Peleó en Ituzaingo a las órdenes del Coronel Brandsen; en La Tablada y Oncativo a las órdenes del Gral. Paz; y en la Ciudadela a las órdenes del Gral. Lamadrid. Estuvo en Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí y Yataití Corá. Fué marido de la Tucumana Visitación García, hermana de Fortunata García, aquella que sacó de la pica la cabeza del Mártir de Metán; y medio hermano del escritor José Antonio Wilde (Cutolo, VII, 727).

<sup>10606</sup> hijo de Tadeo Rojo y Maurín y de Gertrudis Frías y Mallea (Cutolo, VI, 349). Su mujer Dámasa de Alvarado Poveda, hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda Isasmendi, era prima del que luego fuera el Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", sobrina del Gral. Rudecindo Alvarado y pariente de José María Todd (h) (Fernández Lalanne, 1989, 77).

<sup>10607</sup> W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>10608</sup> W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>10609</sup> hijo del Coronel W. Wilde.

<sup>10610</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>10611</sup> Matienzo, 1910, 139; citado en Rouquié, 1981, 80.

<sup>10612</sup> Leguizamón, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 14-V-1873, p.39.

<sup>10613</sup> cuñado de Bernardo de Irigoyen.

<sup>10614</sup> Barraquero, 1926, 482.

<sup>10615</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

<sup>10616</sup> Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 29-IX-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).

---

<sup>10617</sup> me ha sido imposible hasta ahora identificar con precisión a este Comandante candidato a Gobernador.

<sup>10618</sup> J. Roca a Víctor Lucero, Río IV, 28-VIII-1876 (Lucero, 1931, 163).

<sup>10619</sup> J. Vicente de la Vega a J. Roca, La Rioja, 15-XII-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13).

<sup>10620</sup> heredera de la Inspección General de Ejército, ver Auza, 1971, Cap. VI.

<sup>10621</sup> ver Saguier, 1995.

<sup>10622</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 31-V-1882, I, 214.

<sup>10623</sup> Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 29-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>10624</sup> "...comprenderás fácilmente lo difícil que ha sido para nuestro amigo [Cnel. Baldomero Lamela], el disciplinar un cuerpo, al cual no lo podía reunir y cuyos oficiales, en su mayor parte inservibles estaban acostumbrados a cometer toda clase de faltas impunemente, contando con el apoyo de un superior a Lamela, como era el Jefe de la Frontera Cnel. [Juan] Solá. Estas causas, la existencia de algunos malos oficiales en el Regimiento que quizá estén comprometidos en la sublevación y la política misma han sido los móviles de la sublevación del Escuadrón, que tuvo lugar el 8-IX-1886. Y no tengo duda que la política ha obrado directamente, pues de la declaración de algunos soldados se ha sabido que el Gral. [Napoleón] Uriburu, tuvo algunas conferencias en su casa, en la Ciudad de Jujuy, con el cabecilla de la sublevación, un Sargento Pereira, que perteneció al doce de Caballería cuando dicho General era su Jefe. Cabecilla que al entrar a esta ciudad con la soldadesca desenfrenada hacía vivir a Rocha, entre los gritos de júbilo que lanzaban al entregarse al pillaje y que vino a mi casa a la cabeza de los insurrectos en mi busca, gritando que quería apoderarse de mi cabeza y lavar sus manos en mi sangre. Cuando este vandido llegó a mi casa, yo había tenido tiempo de apretarme el gorro y no encontrando mas que a mis peones, porque el pájaro se le voló, punzaban a estos con sus sables queriéndolos obligar a dar vivas a Rocha y como estos se negaron a ello les sobaron los lomos con una soberana paliza. Estos vandidos que han saqueado esta zona de la Provincia inducidos por un Teniente de Rocha, nos han dado, desgraciadamente para nosotros, una prueba gráfica de lo que hubiera sido nuestro país si nuestra fatalidad hubiera entronizado a éste en el poder con hombres que no han vacilado un momento en entregar a poblaciones indefensas al saqueo y a dejar en la mayor indigencia a muchas familias, para satisfacer ambiciones ruines e ilegítimas" (Angel Quirós a J. Roca, Orán, 4-X-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.55).

<sup>10625</sup> J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 23-V-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. C., Leg.23).

<sup>10626</sup> Linares Quintana, 1942, II, 377.

<sup>10627</sup> Caballero, 1910, 73.

<sup>10628</sup> Irigoin, 1995, 26.

<sup>10629</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

<sup>10630</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

<sup>10631</sup> Exposición del Senador Nacional Carlos Serrey, Cámara de Senadores, Sesión del 9-VI-1939, citado en Linares Quintana, 1942, II, 571.

<sup>10632</sup> ver los Digestos de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su acápite sobre Control de Constitucionalidad.

<sup>10633</sup> Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con aquellas familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado

---

por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del novio y su origen europeo. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; y en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda. Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fue siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entonces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la elite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, aún hoy en día, en los estados populistas tardíos, y en los partidos políticos, de las prácticas nepóticas propias de los estados oligárquicos. Observar en el caso de Colombia, los artículos de Leal Buitrago (1988) y de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso de la Argentina, en el último gobierno de la Unión Cívica Radical, observar como algunos círculos o clanes familiares se enseñorearon de las estructuras de poder, contradiciendo así las tradiciones republicanas y anti-oligárquicas del Radicalismo. Observar también el caso de las dinastías oligárquicas de Corrientes (los Romero), Neuquén (los Sapag) y Catamarca (los Saadi). (Página 12, 17-IX-1989, pp.6-7; *El Informador Público*, 6-X-1989, año 4, n.158, p.6; y *Los Periodistas*, 20-X-1989, año I, n.6). Y finalmente estudiar el caso más reciente de los clanes riojanos de Menem y Yoma (Díaz et. al., 1989).

<sup>10634</sup> Lohmann Villena, 1974, LIV.

<sup>10635</sup> Botana, 1977, 204, nota 3. Para nuestro análisis, la portación de un mismo apellido por dos gobernadores, senadores, o diputados, no garantizaba la existencia de nepotismo u oligarquía, el cual para que causara efectos políticos, y poder ser así caracterizados como tales, debía estar al menos dentro del cuarto grado de consanguinidad o dentro del segundo grado de afinidad. En ese sentido, era más próximo el parentesco entre cuñados, concuñados, consuegros, y entre suegros y yernos, que como es obvio no portaban el mismo apellido, que entre aquellos que sí lo llevaban. Por otro lado, si bien Botana reserva a los parentescos una sección de su obra, le asigna sin embargo a éstos sólo el carácter de supervivencias o "sedimentos persistentes de la tradición señorial" (Botana, 1977, 161. Igual opinión tuvieron el Diputado Nacional Delfín Gallo en ocasión de la Intervención a Corrientes en 1878, y el Diputado Nacional Andrónico Castro en oportunidad de la Intervención a Tucumán en 1893).

<sup>10636</sup> Si las hermanas que se intercambiaban para desposar eran también sus primas la alianza se consolidaba aún mas. Es así que, cuando los clanes familiares se superponían entre facciones políticas antagónicas, el matrimonio consanguíneo y el parentesco servían como elementos disuasorios del conflicto. Y, cuando por el contrario, los clanes familiares se polarizaban entre facciones políticas opuestas, el conflicto se acentuaba.

<sup>10637</sup> Cassel, 1993, 664.

<sup>10638</sup> Con respecto a la educación transmitida a los hijos, Alejandro Paz, un hermano de José C. Paz, le confesaba a su primo Julio A. Roca, seguramente haciendo referencia a la educación de su hijo Julito, que "...no has tenido poca suerte, porque todos los hombres que ocupan altas posiciones en el país tienen una estrella fatal para sus hijos cuando estos se educan o se desarrollan durante el apogeo de aquellos. Los Paz, los Lavalle, los Mitre, etc. no han transmitido gran cosa de ellos a su prole. La confianza en un porvenir asegurado a la sombra de la gloria de los padres, la poca atención que estos prestan a su educación absorbidos como están por la cosa pública, y las lisonjas que les prodigan especulativamente los que figuran alrededor de todo hombre de alta influencia hacen que los niños se engrían, desdeñan el estudio y creen innecesario los méritos propios para sobrevivir y formar una posición propia" (Alejandro Paz a J. A. Roca, París, 30-I-1887, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

---

<sup>10639</sup> abolengo, alcurnia, prosapia.

<sup>10640</sup> Graciarena, 1978, 57.

<sup>10641</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>10642</sup> ver Eduardo R. Saguier: "El Periodismo como instrumento de la competencia partidaria. El caso de las provincias en la Argentina decimonónica", ponencia presentada al Primer Encuentro Argentino-Chileno de Estudios Históricos, a celebrarse en Mendoza en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, del 9 al 12 de Noviembre de 1995; y "La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina", ponencia presentada en el Primer Congreso de Investigación Social: Región y sociedad en Latinoamérica. Su problemática en el noroeste argentino, celebrado en Tucumán entre el 6 y el 8 de setiembre de 1995.

<sup>10643</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al márgen del fin utilitario que dió origen a cada documento.

<sup>10644</sup> Zimmermann, 1994, 5.

<sup>10645</sup> En oportunidad de debatirse la incompatibilidad de la Diputación del Dr. José Arce con el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Enrique Dickmann expresaba "...que la organización universitaria de 1886 a 1906, ha sido oligárquica, cerrada; un régimen que muchos jóvenes no conciben ahora. No existía ningún principio democrático en la vida universitaria. Los grupos directivos de aquel entonces se llamaban académicos, eran vitalicios y se elegían entre ellos mismos. Por renuncia o por muerte de un académico, los académicos restantes lo reemplazaban. Era una especie de cónclave de cardenales. Pudo en un comienzo responder a un estado de cultura incipiente, a un estado de desconfianza en la capacidad colectiva de la vida universitaria; pero con el andar del tiempo, aquellos grupos cerrados, oligárquicos, se han convertido en camarillas y hubo necesidad de una verdadera revolución universitaria para acabar con aquel régimen" (Exposición del Diputado Nacional Enrique Dickmann, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.386).

<sup>10646</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 2-VI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31); y Diputado Nacional Enrique Dickmann, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1924, t.V, 382-404; citado en Linares Quintana, 1942, II, 364. Acerca del debate parlamentario sobre la Ley Avellaneda, ver Rodríguez Bustamante, Norberto (1985).

<sup>10647</sup> se opusieron a su licencia los Diputados Nacionales Láinez y Mansilla (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Reunión n.14, del 25-VI-1924, p.739; citado en Linares Quintana, 1942, II, 378). Diez años más tarde, Alcorta es mencionado por Felipe Yofre como que "...quedaba gozando de los dos ministerios del Interior y de Guerra, sin haber cortedad, como en otro tiempo solía disfrutar del rectorado del Colegio, de la cátedra, del directorio del Banco Nacional o de la diputación al Congreso (Felipe Yofre a J. Roca, Berlín, 22-IX-1897, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76). Respecto a las prácticas económicas y privadas de Alcorta, ver Salcedo, 1995.

<sup>10648</sup> ver el debate acerca de la Reforma Universitaria de Córdoba, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, II, 535-557.

<sup>10649</sup> Cuando el Senador Nacional Joaquín V. González asumió en 1909 la Presidencia de la Universidad de La Plata nadie planteó la incompatibilidad del cargo que asumía. Recién quince años después, quien aludió a dicha incompatibilidad fué el Diputado Nacional Enrique Dickmann (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.399-400; citado en Linares Quintana, 1942, II, 382 y 386). Sobre la gestión de González en la creación de la Universidad de La Plata, ver Roldán, 1993, cap.IV. Al referirse al Senador González, Dickmann aclaraba que el respetaba y admiraba "...la inteligencia superior del ex-Senador y ex-Ministro González. Fué un hombre muy capaz. Pero como en muchos casos de hombres públicos, su mente no iba paralela con su desarrollo ético. En este aspecto no puede ser un ejemplo para la nueva democracia argentina. Podría decir de Joaquín V. González --guardando las distancias con el tiempo y el espacio-- que se parecía a Lord Bacon: gran desarrollo mental y escaso desarrollo ético" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.399)

---

<sup>10650</sup> Diputados Nacionales Enrique Dickmann y Juan A. González Calderón, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 11-IX-1924, Reunión n.35, t.V, pp.400-404; citados en Linares Quintana, 1942, II, 382 y 386. Dickmann, pretendía que un Rector "...sea inmaculado, sea un hombre equidistante de todos los grupos y de todos los partidos, no sea un hombre militante en ningún bando político y que no pueda ser sospechado en ningún momento de favorecer tal o cual interés de grupo, de partido o de secta" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 25-IV-1924, Reunión n.14, t.I, p.741).

<sup>10651</sup> Dooley, 1990, 462; y Pacheco, 1994, 38.

<sup>10652</sup> Bourdieu y Passeron, 1970; y Serrano, 1990, 247.

<sup>10653</sup> *Ibidem*. Esta misma tesis es manifestada en González, 1900, 132; y reproducida en Roldán, 1993, 98.

<sup>10654</sup> debo esta reflexión a la advertencia que me formulara la Prof. Berta Braslavsky.

<sup>10655</sup> Dooley, 1990, 469.

<sup>10656</sup> Mayer, 1981, 270.

<sup>10657</sup> Dooley, 1990, 462.

<sup>10658</sup> Dooley, 1990, 479; y Morin, 1992, IV, 64-70.

<sup>10659</sup> ver Saguier, 1995a y 1995b.

<sup>10660</sup> Para el caso de la educación española, ver Delgado Criado (1993); para el de la norteamericana, ver Vinovskis (1987) y Fass (1992); para el de la francesa, ver Mayeur (1984); para el de la Peruana, ver Fell (1987); y para el de la Chilena, ver Serrano (1990); Cavieres F. (1989-90); Yeager (1991); Muñoz Gomá (1993) y Cruz (1995-96).

<sup>10661</sup> La Patria Argentina se preguntaba: "...¿Porqué todos los empleos son permanentes y el de los profesores de los colegios nacionales se renueva cada año? ¿Porqué se tiene a los profesores con el Jesús en la boca al principio de cada año? La razón es muy simple. Hubo un tiempo en que el Ministro de Instrucción Pública organizó todo el personal de profesores como elemento electoral. Entonces se estableció que los nombramientos se renovarían anualmente, con el objeto de hacer saltar a los que no llenasen su misión. Después, los demás ministros han seguido maquinalmente esta costumbre, sin explicarse la razón de ella" (La Patria Argentina, Lunes 19-II-1883, n.1510).

<sup>10662</sup> Rivarola (1908) revelaba que "...se ha denunciado como una de las causas en el fracaso de la instrucción secundaria la necesidad de ceder a las exigencias de las políticas locales, en que se han visto los Ministros de Instrucción Pública, que han tenido compromisos o tendencias partidistas" (Rivarola, 1908, 374).

<sup>10663</sup> José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 18-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.

<sup>10664</sup> Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 29-V-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5.

<sup>10665</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 14-III-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba se hallaban acumulados en el Dr. Vieira los ramos de Derecho Internacional y Derecho Constitucional; en el Dr. Telasco Castellanos los de Derecho Natural y Derecho Público Eclesiástico; en el Dr. Soria los de Derecho Administrativo y Estadística; y en el Dr. Nicéforo Castellanos los de Derecho Penal y Derecho Comercial (Nataniel Morcillo a J. Roca, Córdoba, 14-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10666</sup> "...Quinet, Voltaire, Flamarion, Laboulaye y Chateaubriand o Lamartine ocupan mis horas sustraídas a la política o a la profesión" (Abrahám Echazú a Victorino de la Plaza, Salta, 12-III-1880, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 5-1-2).

<sup>10667</sup> Abrahám Echazú a Victorino de la Plaza, Salta, 12-III-1880 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 5-1-

---

2).

<sup>10668</sup> su conflicto con las autoridades se había agravado con motivo del apoyo que le brindara el Nuncio Apostólico Luis Matera (Rato de Sambucetti, 1980, 430).

<sup>10669</sup> N. Morcillo a J. A. Roca, Córdoba, 7-VI-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.38.

<sup>10670</sup> Francisco J. Ortiz a J. Roca, 13-VII-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.17).

<sup>10671</sup> Dr. Osvaldo Magnasco, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22 de Septiembre de 1900, Reunión n.61, p.1367.

<sup>10672</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 11-VI-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.613).

<sup>10673</sup> nacido en San Juan, colaborador de La Voz de Cuyo en 1867, órgano del Club del Pueblo o más bien del Gobernador Valentín Videla; Rector del Colegio Nacional; fundador y director del periódico La Rioja Moderna; director de El Heraldó (vocero de la candidatura oficialista del Gral. Enrique Godoy); emigró a La Rioja luego del asesinato de Videla (Cutolo, II, 51; y Videla, 1990, VI, 601). Bajo el seudónimo de Antón Caballero, fué autor de La redención de un pueblo (Narración histórico-pintoresca de los sucesos políticos de la provincia desde 1906 hasta 1907) (San Juan: Imp. Sarmiento, 1910).

<sup>10674</sup> "El Desquicio educacional", El País (San Juan), 1906, citado en Caballero, 1910, 69.

<sup>10675</sup> Segundo Benavidez a J. Roca, San Juan, 18-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7.

<sup>10676</sup> Nataniel Morcillo a J. Roca, San Juan, 4-III-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22.

<sup>10677</sup> integrado por Cristóbal Cavalli, David Chávez, José María Sarmiento, Manuel Quiróz, Tristán Ríos y Adám Zavalla (Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 8-III-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10678</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 8-III-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10679</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 3-V-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>10680</sup> Follari, 1995, 162.

<sup>10681</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43). La Palabra había sido fundada en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>10682</sup> fundado en 1880, propiedad del Dr. Moisés Lucero.

<sup>10683</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43).

<sup>10684</sup> Oseas Guiñazú a M. Juárez Celman, Mendoza, 29-IV-1990 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.29).

<sup>10685</sup> Oseas Guiñazú a M. Juárez Celman, Mendoza, 29-IV-1990 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.29).

<sup>10686</sup> P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 26-IV-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>10687</sup> "...Toda la prensa antiroquista ha aplaudido al mazhorquero Posse, al famoso y público caudillo del Club de los Laspiuristas y Tejedoristas en Córdoba (pero hasta el triunfo de nuestras armas!!!" (P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 25-V-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.16).

<sup>10688</sup> Posse, 1993, 113.

<sup>10689</sup> hijo del Gobernador Cnel. Vicente Tamayo Arias y de Virginia Gurruchaga; cuñado del Dr. Eliseo Outes Lesser; y primo político del Gobernador Nicolás Careño.

---

<sup>10690</sup> Rafael Ruiz de los Llanos a J. A. Roca, Buenos Aires, 1-III-1885, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. Roca, Leg.44.

<sup>10691</sup> Luciano Gorostiaga a D. Rocha, Salta, 9-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>10692</sup> yerno del ex-Gobernador Francisco Alvarez.

<sup>10693</sup> Manuel J. Navarro a Dardo Rocha, Catamarca, 30-III-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>10694</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 24-XII-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>10695</sup> Francisco C. Figueroa a J. Roca, Catamarca, 23-II-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

<sup>10696</sup> Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>10697</sup> abuelo materno del historiador Alfredo Díaz de Molina.

<sup>10698</sup> Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391).

<sup>10699</sup> N. Barros a Juárez Celman, Buenos Aires, 22-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20.

<sup>10700</sup> refiriéndose a su hermano Luis Vélez, Juárez Celman le contaba a Roca que "...El hijo de un limosnero no puede tener jamás condiciones de carácter. Se ha criado en el cervilismo del mendigo, hincando la rodilla delante de todo el que podía darle un pan y pasando por todo género de humillaciones para escalar a uno todos los puestos públicos rentados" (Juárez Celman, Córdoba, 22-XI-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6).

<sup>10701</sup> Onésimo Leguizamón a Víctor C. Lucero, Buenos Aires, 27-IX-1877, en Lucero, 1931, 134.

<sup>10702</sup> Absalón Rojas a J.R., Tucumán, 13-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35.

<sup>10703</sup> Absalón Rojas a J. A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. Uno de los profesores cuya separación pedía Rojas era el Dr. Belisario Saravia "...que yo no sé por empeño de quien fué nombrado el año pasado y ha seguido y sigue aún enemigo decidido de nuestro partido no solamente en el orden local sino también atacando la política del Gobierno Nacional desde las columnas del periódico que dirige Gorostiaga y Corvalán" (Absalón Rojas a J. A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.).

<sup>10704</sup> Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 16-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24. Según Wilde, en el Colegio entra como ya lo he dicho el Sr. Silveti, y en la Escuela Normal, el Dr. Ramón Pizarro y el Dr. Remigio Carol. Rojas proponía también en su lista al Dr. Angel Fernández, en reemplazo de D. Pablo C. Vella, a quien indicaba para Vice-Rector del Colegio Nacional, pero como este último no ha podido hacerse por no haberse ascendido a Rector al Vice-Rector actual, no ha sido posible acordar al Sr. Fernández la clase solicitada" (Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 16-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

<sup>10705</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>10706</sup> Nacido en Chilecito, La Rioja, hijo de Tadeo Carrizo y de Micaela Carrizo, y probablemente sobrino del Diputado Provincial por La Rioja Nicolás Carrizo. Don Nicolás Carrizo, fué asimismo Ministro de Gobierno de Villafañe y de Rubén Ocampo; y Gobernador Delegado en 1868 y 1877. Era sobrino del Gobernador Francisco S. Gómez (Cutolo, II, 168). Fué designado Procurador Fiscal de Jujuy en Junio de 1905, y era casado con Eloisa Rueda Castañeda, viuda del Cnel. Julio Iriarte, hija de Angel Rueda y de Genara Castañeda, poseedores de una finca en San Pedrito, Jujuy.

---

<sup>10707</sup> Domingo T. Pérez a J. Roca, Alisos, Jujuy, 16-X-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>10708</sup> Luis del Carril era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavidez Balmaceda, vecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65).

<sup>10709</sup> Luis del Carril a J. Roca, Milán, 19-IV-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10710</sup> Luis Carril a J. Roca, Milán, 19-IV-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). María Josefa Cabezón era asimismo hermana de las educacionistas Dámasa Cabezón de Córdoba y Manuela Cabezón de Jordán, e hijas del ciudadano español José León Cabezón y de María Martínez Outes (Sosa de Newton, 1980, 75-76).

<sup>10711</sup> Luis Cané o Carril a J. Roca, Milán, 19-IV-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>10712</sup> Juan P. Albarracín a J. Roca, San Juan, 22-XII-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>10713</sup> exposición del Diputado Nacional Américo Ghioldi, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.56, 27 y 28-IX-1934, p.464).

<sup>10714</sup> "...Yo les abrí mi casa; dándoles alojamiento completo por un precio insignificante, y hasta con perjuicio de mis intereses pecuniarios, pero al verlas tan desamparadas, y que en ninguna casa de huéspedes de esta ciudad serían admitidas, no pensé sino en el acto humanitario que tenía ocasión de ejercer, y consecuente con mis sentimientos lo hice" (Malvina Ocampo de Navarro a Juárez Celman, Córdoba, 17-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

<sup>10715</sup> Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18. Al Gobernador había llegado el rumor de que Posse tenía el pensamiento "...de ponerles [a los Dres. Emidio y Juan Terán] las clases a horarios incómodos de modo que otras atenciones de más importancia que tienen les impidan concurrir a las clases" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 15-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). El hecho era que como en los Tribunales los horarios cambiaban según las estaciones, el Juez y Profesor Dr. Emidio Terán pretendía "...que lo haga para su exclusivo provecho ¿porqué no pide allá y no acá que le acomoden las horas?" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 5-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Tal era la ofensiva emprendida por Nogués contra Posse, que su sobrino Benjamín Posse le escribe a Roca para decirle "...que al pobre Tío Pepe lo están embromando de una manera muy fea. Todos esos nombramientos que están haciendo para ese Colegio Nacional son actos de franca hostilidad a su persona" (Benjamín Posse a J. A. Roca, Córdoba, 8-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 15). Y en Abril de 1881 Nogués le pedía a Roca que no aceptara la renuncia de Terán "...para de este modo hacer comprender a Don José que no es dueño absoluto del Colegio Nacional i que si pretende servirse de él para satisfacer sus rencores el Gobierno Nacional no está dispuesto a consentir en que sacrifiquen a nuestros amigos" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 7-IV-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Seis meses después, Nogués le informa que sus amigos "...con un pretexto o con otro han sido separados del Colegio y los que todavía se conservan allí como Aráoz, [Agustín] Vega y otros, son constantemente hostilizados y estos que necesitan el sueldo que ganan ven que la cooperación que prestan a mi gobierno tiene que serles tal vez muy cara" (Miguel M. Nogués a J. A. Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18).

<sup>10716</sup> Guillermo San Román, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 23-VI-1886, I, 286.

<sup>10717</sup> Guillermo San Román, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 23-VI-1886, I, 286.

<sup>10718</sup> Miguel M. Nogués a J. Roca, Manantial, 25-XII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>10719</sup> entre otros numerosos profesores extranjeros registrados debemos recordar en Concepción del Uruguay a los Profesores Larroque, Alejo Peyret, Pasquier, y de la Vergne; en Tucumán a Amadeo Jacques; en Catedral al Sur a Raúl Legout; en Corrientes a Patricio Fitz Simon; y en Paraná a Jorge Stearns (exposición del Diputado Nacional Américo Ghioldi, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 27 y 28 de

---

Septiembre de 1934, Reunión n.56, p.471).

<sup>10720</sup> Manuel J. Navarro a J. Roca, Catamarca, 2-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>10721</sup> V. García Aguilera a Juárez Celman, La Rioja, 9-I-1882 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10).

<sup>10722</sup> Francisco C. Figueroa a Juárez Celman, Catamarca, 6-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17.

<sup>10723</sup> Guillermo Correa a J. R., Catamarca, 8-III-1905, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.105.

<sup>10724</sup> Francisco J. Ortiz a J. A. Roca, Salta, 29-XI-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13. Dávalos era nacido en 1817, por lo que en 1880 contaba sólo con 63 años.

<sup>10725</sup> D. Ignacio Ortiz llena las condiciones de ilustración y competencia para el cargo de Profesor de Historia Natural. Domingo Güemes para Filosofía o historia. El Dr. Tomás Maldonado para química o física. D. Pablo Abramora o Alzamora para lenguas vivas" (Francisco J. Ortiz a J. R., AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>10726</sup> Director de El País de Santiago del Estero y del Diario Popular de Salta, Inspector General de Escuelas, Gerente del Banco Hipotecario de Santiago del Estero y Presidente del Banco Provincial (Cutolo, III, 410). Era primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz, y marido de una prima hermana de Roca y de Paz, llamada Plácida Figueroa Paz.

<sup>10727</sup> Mariano Gorostiaga a Juárez Celman, Salta, 18-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003216.

<sup>10728</sup> Mariano Gorostiaga a Juárez Celman, Salta, 18-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003216.

<sup>10729</sup> La Patria Argentina, 3-I-1882, año IV, n.1099.

<sup>10730</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 18-IV-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

<sup>10731</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, Buenos Aires, 11-I-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>10732</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, Buenos Aires, 11-I-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>10733</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, Buenos Aires, 11-I-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>10734</sup> La Razón (Tucumán), 13-IV y 22-IV-1877, reproducidos en La América del Sud (Buenos Aires), citados en Posse, 1993, 140.

<sup>10735</sup> hermano de Jaime Vieyra. Redactor de El Vulgarizador en 1876 (Galván Moreno, 1944, 432).8

<sup>10736</sup> Pedro Vieyra a J.R., Santiago del Estero, 14-XI-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>10737</sup> P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 20-X-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

<sup>10738</sup> Gianello, 1964, 123 y 128.

<sup>10739</sup> Gianello, 1964, 128. El Diputado Nacional Juan Balestra, recordaba en Septiembre de 1900, con referencia a las modificaciones en los programas, en los horarios, en los métodos y en la disciplina de los Colegios Nacionales que "...a la mitad de los estudios, el plan que seguíamos, que daba primacía a las matemáticas, fué cambiado por un plan latinista; cuando llegábamos al final de los estudios, este plan latinista fué nuevamente cambiado por otro de índole moderna. !No existe una generación argentina que haya escapado a estos bizarros vaivenes educacionales! ¿Cuál ha sido el resultado de tales anomalías? Que nuestros planes de estudios han sido, en definitiva, un conjunto de partes heterogéneas aplicadas, sin embargo, a un elemento único, como es una generación, que debía ser formada por el fárrago de propósitos discordantes, bizarramente entremezclados por la acción sucesiva de los ministros empeñosos en hacer el ensayo de sus

---

ideas cuando no en hacer prevalecer vanidades peligrosas. Y por ese camino hemos llegado a tal confusión en materia de programas, de planes, de propósitos, que sería hoy difícil marcar concretamente la resultante de la tendencia educativa argentina, enturbiada, desarticulada, desbarajustada por la movilidad y privada, en consecuencia, de la única eficacia posible de las ideas educacionales que consiste en su duración" (Juan Balestra, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 26 de Septiembre de 1900, Reunión n.64, p.1452).

<sup>10740</sup> Olaechea y Alcorta a J. A. Roca, Santiago del Estero, 29-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>10741</sup> redactor de El Norte, periódico Taboadista que circulara en Santiago del Estero entre 1866 y 1874, impreso por la Imprenta Oficial (Galván Moreno, 1944, 431).

<sup>10742</sup> Eusebio García a J.R., 20-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>10743</sup> Eusebio García a J.R., 20-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>10744</sup> Gianello, 1964, I, 136.

<sup>10745</sup> Gianello, 1964, 138.

<sup>10746</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>10747</sup> ver Saguier, 1995 y 1997.

<sup>10748</sup> Facchinetti de Alvarez (1969/71), Urquiza Almandó (1972), Auza (1978), Duncan (1980), Halperín Donghi (1985), Sidicaro (1993), Myers (1995) y Sabor (1995).

<sup>10749</sup> Según Borón (1972) la movilización psicosocial e ideológica, es una de las tres componentes de la movilización política, conjuntamente con la movilización organizacional y la electoral (Borón, 1972, 217).

<sup>10750</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento (Carmagnani, 1988, 12).

<sup>10751</sup> depositados en la Sala VII del Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.

<sup>10752</sup> acerca de este concepto, ver Akhavan-Majid (1990) y Espina (1993). Para el Diputado Nacional Miguel Cané, la prensa constituía un quinto poder en la opinión pública por influir en la administración del gobierno (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 30-V-1877, p.108).

<sup>10753</sup> Duncan, 1980, 778; y Pacheco, 1994, 32. Ver el debate acerca de la libertad de prensa, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, I, 224-281.

<sup>10754</sup> Alvarez Prado, 1922, 95.

<sup>10755</sup> McEvoy, 1994, 104. Para el caso de España, ver Guerra, 1993, capítulo VII; para el de los Estados Unidos, ver Payne, 1920, 1970; Leonard (1987), Schudson (1990), Smith (1990), Fass (1992) y Summers (1994); para el de Colombia, ver Otero Muñoz (1932); Silva (1988); Calderón (1989); Vallecilla López (1991); Pacheco (1994); Molano (1994) y Cacia Prada (1994); para el de Venezuela, ver Febres de Cordero G. (1983); para el del Perú, ver Romero (1939); Herzog (1992); y McEvoy (1994); para el del Uruguay, ver Fernández y Medina (1900); para el del Paraguay, ver Warren (1983); para el de Chile, ver Silva Castro (1958); y para el rol de Sarmiento en Chile, ver Jaksic (1991-1992). En la Argentina, autores como Zinny (1866-67, 1870, 1883), Galván Moreno (1944), Vásquez (1970), Bischoff (1986, 1994) y Rojo (1991) ensayan la crónica erudita. Galván Moreno (1944) se funda en Zinny y en diversas Compilaciones de Leyes y Decretos. García Soriano (1972) y Auza (1978) nos ilustran con gran detalle los mecanismos mediante los cuales el periodismo de entonces incidió profundamente en el curso de los hechos políticos. Vidaurreta (1988) intentó una periodización. Por otro lado, Halperín Donghi (1885) y Duncan (1980) incursionaron en estudios de contenido de periódicos porteños de las décadas del '70 y '80; y Sidicaro (1993) ensaya un género crítico repleto de sugerencias y agudas observaciones, pero para un período posterior al que aquí abordamos.

- 
- <sup>10756</sup> Dooley, 1990, 462; y Pacheco, 1994, 38.
- <sup>10757</sup> Dooley, 1990, 469.
- <sup>10758</sup> Dooley, 1990, 462.
- <sup>10759</sup> ver Eder, 1992.
- <sup>10760</sup> Dooley, 1990, 479; y Morin, 1992, IV, 64-70.
- <sup>10761</sup> Luhmann, 1995, 11.
- <sup>10762</sup> ver Saguier, 1995a y 1996-1997.
- <sup>10763</sup> Eugenio Tello a J. Roca, Jujuy, 7-IV-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.30.
- <sup>10764</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>10765</sup> fundado en 1853 y dirigido por Damián HGudson, Alejandro Carrasco y otros (Galván Moreno, 1944, 382).
- <sup>10766</sup> fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383).
- <sup>10767</sup> fundado en 1870 (Galván Moreno, 1944, 383).
- <sup>10768</sup> Esta familia de banqueros era de filiación Mitrista (Cunietti-Ferrando, 1989, 23). Ver Bragoni, 1993; Fortín de Iñones, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata la quiebra, crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.
- <sup>10769</sup> Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.
- <sup>10770</sup> fundado por el Rochismo.
- <sup>10771</sup> M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 3-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26.
- <sup>10772</sup> fundado en 1883 por Ernesto Colombres, apoyó la candidatura de Bernardo de Irigoyen y mantuvo siempre --con excepción del gobierno de Juan Posse, y a diferencia de La Razón (que propició la candidatura de Dardo Rocha)-- una férrea actitud opositora a las situaciones provinciales (García Soriano, 1972, 22 y 40).
- <sup>10773</sup> Lucas Córdoba a J. Roca, Tucumán, 27-VII-1901, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.96.
- <sup>10774</sup> Urquiza Almandó, 1965, III, 189.
- <sup>10775</sup> Juan A. Martínez a D. Rocha, Uruguay, 11-V-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).
- <sup>10776</sup> Juan Coronado a Victorino de la Plaza, Entre Ríos, 26-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.291.
- <sup>10777</sup> fué fundado en 1866 (Galván Moreno, 1944, 364).
- <sup>10778</sup> Afamado periodista, hijo del Gral. Bartolomé Mitre (Cutolo, IV, 587).
- <sup>10779</sup> Era una revista literaria de gran prestigio que apareció en Santa Fé en 1885 (Galván Moreno, 1944, 418).
- <sup>10780</sup> Balleto y Marcos Funes, a juicio de Racedo, "...son muy poca cosa con relación al primero

---

[Ruiz]...como hombre plumista, quiero decir periodistas, tienen necesidad de comer y se alquilan para elucubrar la 'idea'" (E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 25-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32).

<sup>10781</sup> Rafael Cortés a J. Roca, San Luis, 2-II-1876, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.3.

<sup>10782</sup> fundado en 1870, dirigido por Wenceslao Paunero para patrocinar la candidatura a Gobernador de Juan Llerena, opuesto a El Oasis, periódico que sostenía la candidatura de Juan A. Ortiz Estrada (Galván Moreno, 1944, 409). El círculo que rodeaba a El Puntano en su segunda época que comienza en 1877 estaba dirigido por Celestino Jorge e integrado por Ignacio Adaro, A. Lavié, y Juan A. Ortiz Estrada (Rafael Cortés a Julio A. Roca, San Luis, 3-III-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>10783</sup> Rafael Cortés a Julio A.Roca, San Luis, 3-III-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4).

<sup>10784</sup> Rafael Cortés a Julio A.Roca, San Luis, 12-III-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4. Juan Agustín Ortiz Estrada estaba procesado por asesinato en las personas de dos hermanos de apellido Quiroga; A. Lavié por falsificación; Ignacio Adaro por estupro; Celestino Jofré también por estupro; un gringo de apellido Paulsera por calumniador; R. Barroso por prevaricato; y Avelino Velásquez por resistencia a la autoridad (Rafael Cortés a Julio A.Roca, San Luis, 12-III-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). A Ortiz Estrada, Carlés le probó "...con su propia firma que era un asesino, un ladrón, un miserable y un cobarde, ante el Jurado que me condenó, por tales piropos, a cien pesos fuertes"; y a Adaro, redactor del periódico Mitrista, por probarle un estupro "...me costó otra condenación" (Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 11-VI-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.16).

<sup>10785</sup> Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 12-I-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5. La Tribuna de Los Andes fué fundada en 1875 (Galván Moreno, 1944, 402).

<sup>10786</sup> Hijo del que fuera en 1829 el Gobernador José Tomás Albarracín y de Tomasa Godoy, casado con Isabel Porven. Era sobrino segundo de Doña Paula Albarracín de Sarmiento, la madre de Domingo F. Sarmiento.

<sup>10787</sup> Hijo de José Santiago Cortínez Rufino y de María Ignacia del Carril (Cutolo, II, 374). Según un tal Luis Arias, en carta fechada en Milán, Cortínez "...es peor que éste [Rafael Igarzábal] y a quien por los antecedentes con su familia no aceptará jamás" (Luis Arias a Julio Roca, Milán, 19-IV-1883, Archivo Roca, Leg.30).

<sup>10788</sup> Nataniel Morcillo a J. A. Roca, San Juan, 30-V-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5. Ignoro cual pueda ser dicho periódico pues la fuente epistolar no lo menciona por su título, pero para la época de marras los periódicos en circulación en San Juan eran La Amistad, fundado en 1870; Los Debates y El Cosmopolita, fundados en 1871; y La Tribuna de los Andes, fundada en 1875 (Galván Moreno, 1944, 402).

<sup>10789</sup> omitido por García Soriano.

<sup>10790</sup> en su número del 28-X-1895.

<sup>10791</sup> Lucas Córdoba a J. Roca, Tucumán, 29-X-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.70.

<sup>10792</sup> Médico, y Senador Provincial por Buenos Aires, falleció en 1910 (Cutolo, VI, 28).

<sup>10793</sup> omitido por Galván Moreno.

<sup>10794</sup> Eugenio Ramírez a Victorino de la Plaza, Corrientes, 22-V-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.390. La Verdad fué fundada en 1876 (Galván Moreno, 1944, 359).

<sup>10795</sup> Rodolfo Alurralde a Victorino de la Plaza, Corrientes, 11-X-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393).

<sup>10796</sup> Rodolfo Alurralde a Victorino de la Plaza, Corrientes, 11-X-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393).

---

<sup>10797</sup> Rodolfo Alurralde a Victorino de la Plaza, Corrientes, 11-X-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393).

<sup>10798</sup> Evaristo Moreno a V. de la Plaza, Concordia, 18-VIII-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392.

<sup>10799</sup> circuló entre 1881 y 1890 (Galván Moreno, 1944, 347).

<sup>10800</sup> Plácido Sánchez de Bustamante a J. Roca, Jujuy, 20-XI-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>10801</sup> de filiación Rochista (Rato de Sambucetti, 1980, 419).

<sup>10802</sup> Nicolás Villanueva al Cnel. Julio Campos, Mendoza, 30-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.207).

<sup>10803</sup> omitido por Galván Moreno.

<sup>10804</sup> ver Bischoff, 1994, 129.

<sup>10805</sup> Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>10806</sup> Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>10807</sup> Bischoff, 1994, 129.

<sup>10808</sup> Sáenz Quesada, 1978; y Hardoy, 1993, 57.

<sup>10809</sup> Jefe del Partido Nacionalista, Jurisconsulto, probablemente de origen Sanjuanino, autor de Homousios o consustancialidad cordobesa entre el editor de una publicación y el autor, sancionada en la ley de Imprenta de 1879 por los tiranuelos Antonio del Viso y Miguel Juárez Celman (Córdoba). Marido de Rosario de la Piedra y Díaz, de la familia propietaria de la Estancia de Santa Catalina.

<sup>10810</sup> F. Figueroa a Juárez Celman, Córdoba, 15-IV-1882, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.10.

<sup>10811</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 23-II-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>10812</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 23-II-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>10813</sup> Joaquín V. Gonsález a Julio A. Roca, La Rioja, 28-II-1891 (AGN, Archivo Roca, Leg.62).

<sup>10814</sup> ver Eduardo R. Saguier: "La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina", ponencia presentada en el Primer Congreso de Investigación Social: Región y sociedad en Latinoamérica. Su problemática en el noroeste argentino, celebrado en Tucumán entre el 6 y el 8 de setiembre de 1995.

<sup>10815</sup> Eran oficialistas, subvencionados por los gobiernos provinciales, en Salta, La Reforma (1875); en Tucumán, El Telégrafo del Norte (1872) (García Soriano, 1972, 20); en Catamarca, La Regeneración, que respondía en 1862 a la intervención del Dr. Marcos Paz (Galván Moreno, 1944, 330); en Santiago del Estero, El País, órgano del Gobernador Sofanor de la Silva; El Ferrocarril, redactado por Federico Alvarez y Ramón Pizarro; y La Opinión Pública, órgano del gobierno de Absalón Rojas (Galván Moreno, 1944, 432); en Córdoba, El Pueblo Soberano, partidario del gobierno proveniente del movimiento revolucionario que encabezó M. J. Olascoaga (Galván Moreno, 1944, 346); en Corrientes, La Opinión, redactada por Vicente G. Quesada; La Nueva Epoca (1861), órgano del gobierno de José Pampín; y La Unión Argentina (1861), del gobierno de M. Rolón (Galván Moreno, 1944, 358); en Entre Ríos, El Constitucional, y La Opinión de Entre Ríos (omitidos por Galván Moreno); en Mendoza, el diario La Palabra (fundado en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383); y en San Luis, El Puntano, del candidato oficial Juan Llerena; y El Telégrafo, defensor del gobierno de Rafael Cortés (Galván Moreno, 1944, 409).

---

<sup>10816</sup> Urquiza Almandoz, 1965, II, 431.

<sup>10817</sup> Director de El País de Santiago del Estero y del Diario Popular de Salta, Inspector General de Escuelas, Gerente del Banco Hipotecario de Santiago del Estero y Presidente del Banco Provincial (Cutolo, III, 410). Era primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz, y marido de una prima hermana de Roca y de Paz, llamada Plácida Figueroa Paz.

<sup>10818</sup> Mariano Gorostiaga a Miguel Juárez Celman, Salta, 18-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003216.

<sup>10819</sup> N. Morcillo a J. Roca, Córdoba, 7-VIII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25).

<sup>10820</sup> Luis G. Pinto a J. Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885 y 30-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>10821</sup> Halperín Donghi, 1985, 79.

<sup>10822</sup> Evaristo Moreno a Victorino de la Plaza, Concordia, 17-IX-1883, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.411.

<sup>10823</sup> fundado por el catamarqueño Ramón Gil Navarro (Bischoff, 1994, 112).

<sup>10824</sup> Miguel M. Nougues a J. A. Roca, Manantial, 25-XII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>10825</sup> Hijo del Gobernador Coronel Martín Güemes y Puch y de Adela Güemes y Nadal, y nieto del prócer Martín Güemes (Cutolo, V, 212). Era casado con María Isasmendi, y fué conuñado del Gobernador Abrahám Cornejo Peralta y tío político del que fuera Gobernador y Senador Nacional Robustiano Patrón Costas.

<sup>10826</sup> fundado en 1884, y dirigido por Ramiro M. Cañavares (Galván Moreno, 1944, 397).

<sup>10827</sup> Mariano Gorostiaga a M. Juárez Celman, Salta, 27-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003214.

<sup>10828</sup> Juarista al igual que su hermano Isaías Padilla Puente y su medio hermano Vicente Padilla Domínguez; y hermano entero de los Rochistas Angel Cruz y Tiburcio Padilla Puente.

<sup>10829</sup> José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003458.

<sup>10830</sup> José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003458.

<sup>10831</sup> Arcadio de la Colina a J. A. Roca, La Rioja, 6-II-1903, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.101.

<sup>10832</sup> Diario fundado por Domingo F. Sarmiento en 1839, desaparecido a los pocos números y vuelto a aparecer después de Caseros (ver Galván Moreno, 1938, 399-407).

<sup>10833</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>10834</sup> omitido por Galván Moreno. Este periódico pasó luego a servir al Juarismo (Rato de Sambucetti, 1980, 419).

<sup>10835</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>10836</sup> Hijo de Simón Posse Tejerina y de Josefa Insúa, casado con Natalia Vásquez; primo hermano de los Gobernadores Juan y Wenceslao Posse Talavera, y de los Diputados Nacionales Emidio Posse Talavera y Filemón Posse Bores; y tío segundo del Diputado Nacional Benjamín Posse Alvarez.

---

<sup>10837</sup> Miguel M. Nougués a J. A. Roca, Tucumán, 26-II-1879 y 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Legs.7 y 18 respectivamente.

<sup>10838</sup> nacido en San Juan, colaborador de La Voz de Cuyo en 1867, órgano del Club del Pueblo o más bien del Gobernador Valentín Videla; director de El Heraldó, vocero de la candidatura oficialista del Gral. Enrique Godoy; emigró a La Rioja luego del asesinato de Videla (Cutolo, II, 51; y Videla, 1990, VI, 601). Bajo el seudónimo de Antón Caballero, fué autor de La redención de un pueblo (Narración histórico-pintoresca de los sucesos políticos de la provincia desde 1906 hasta 1907) (San Juan: Imp. Sarmiento, 1910). Fué revisor y anotador del libro de Nicanor Larraín titulado El país de Cuyo; relación histórica hasta 1872 (Buenos Aires: J. Alsina).

<sup>10839</sup> Antonio Mir Márquez a Juárez Celman, La Rioja, 28-III-1887, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.25.

<sup>10840</sup> Juan P. Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 22-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35.

<sup>10841</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>10842</sup> Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32.

<sup>10843</sup> redactor de El Verdadero Amigo del País y El Fénix. Memoria sobre los acontecimientos notables en la Provincia de Mendoza en 1829, 1830 (Mendoza: Imp. Lancasteriana); cit. en Zinny, 1868, 236; quien a su vez es citado en Galván Moreno, 1944, 386; y en Cignoli, 1980.

<sup>10844</sup> ver Facchinetti de Alvarez (1969/71).

<sup>10845</sup> redactor de El Censor, fundado en 1901 (Galván Moreno, 1944, 403); y de La Provincia, fundado en 1889 (Galván Moreno, 1944, 403), fué ultimado por el Comisario Marcos Silva por haber referido durante las elecciones de 1902, que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, era hijo del matador del Gral. Nazario Benavidez (Videla, 1990, VI, 601; y Saguier, 1997b).

<sup>10846</sup> Bischoff, 1994, 111.

<sup>10847</sup> ver Bischoff, 1994, 122.

<sup>10848</sup> Justo González a Camilo Pereyra, Córdoba, II-1888, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

<sup>10849</sup> "...A las ocho de la noche las calles de Córdoba quedan desiertas= cada uno se mete en su casa y cierra sus puertas. Pasamos por una época tal de terror que únicamente es comparable con la del año 40, cuando Oribe mandaba colgar en el Paseo Sobremonte la cabeza de los salvajes unitarios. No hay exageración en esto mi amigo, pues no tengo duda que si esta situación continúa empezarán los Cordobeses a emigrar como emigraron los argentinos más distinguidos en la época de Rosas" (Justo González a Camilo Pereyra, Córdoba, II-1888, AGN, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>10850</sup> no confundir con otro periódico del mismo nombre aparecido en Córdoba (Bischoff, 1994, 100).

<sup>10851</sup> Urquiza Almandóz, 1965, III, 13.

<sup>10852</sup> Mantilla, 1887, 95-97.

<sup>10853</sup> García Soriano, 1972, 35.

<sup>10854</sup> Caballero, 1910, 65.

<sup>10855</sup> En San Juan, donde el Gobernador Coronel Carlos Sarmiento impuso en 1907 una ley de imprenta, a juicio de El Diario esta ley "...constituye una vergüenza para la cultura de la república, que es abiertamente contraria a los principios de nuestra carta fundamental. Por esa ley el gobierno tiene a su cargo la formación del jurado que debe entender en los delitos de imprenta. Luego califica el delito y por último ejecuta la pena.

---

Ya el jurado para juzgar lo que se llama 'delitos de imprenta' es casi un contrasentido ante el moderno concepto de la penalidad. Los delitos que cometen los periodistas son delitos comunes, calumnias, injurias, etc., para los cuales están los tribunales ordinarios. Así, con este concepto han abordado el asunto las legislaciones más adelantadas. Ahora bien, el jurado por su parte es y ha sido siempre, en todas partes del mundo, una institución de origen esencialmente popular y por lo tanto electivo. Jamás puede ser constituido por nombramiento del gobierno, porque eso importaría convertir a este en juez y parte. Tal es precisamente lo que está sucediendo en San Juan, debido a una ley monstruosa aplicada por un gobernante impulsivo. La prédica de la oposición sanjuanina y la de todos los diarios de la república que han hecho de esto una causa de solidaridad periodística, debe encaminarse en primer término a conseguir la derogación de la ley que consiente semejantes atropellos y uno de los mejores caminos a seguir sería el de demandar su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte" (El Diario, 14-III-1910).

<sup>10856</sup> Fundado en 1861 y redactado por Pedro Nicolari (Galván Moreno, 1944, 420).

<sup>10857</sup> Pedro L. Funes a Estanislao Zeballos, Santa Fé, 26-III-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.44.

<sup>10858</sup> F. Figueroa a Juárez Celman, Córdoba, 15-IV-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10.

<sup>10859</sup> Eliseo Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 12-V-1878, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-14, fs.479.

<sup>10860</sup> fundado en 1860 (Galván Moreno, 1944, 397).

<sup>10861</sup> fundado en 1865 (Galván Moreno, 1944, 397). Lamentablemente la colección de este afamado periódico que existiera en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata ha desaparecido por la incuria de las autoridades responsables de su salvaguarda.

<sup>10862</sup> Cutolo, IV, 229.

<sup>10863</sup> diario de la tarde, órgano de la Unión Cívica, fundado en 1891 y dirigido por el Dr. Luis Peña (Solá, 1924, 79)..

<sup>10864</sup> diario de la mañana, fundado en 1896 y dirigido por el Sr. Conrado M. Serrey (Solá, 1924, 81).

<sup>10865</sup> entre los cuales estaban los Delfinistas y Güemistas Tomás Oliver, Carlos Grande, Francisco J. Alsina, el Dr. García, y el Dr. Angel M. Ovejero.

<sup>10866</sup> Eliseo Outes a Julio A. Roca, Salta, 16-VIII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.73).

<sup>10867</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43). La Palabra había sido fundada en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383); y pasa luego a servir en las filas del Juarismo (Rato de Sambucetti, 1980, 419).

<sup>10868</sup> fundado en 1880, propiedad del Dr. Moisés Lucero.

<sup>10869</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43).

<sup>10870</sup> fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383). Según El Ferrocarril, Ortega "...es un animal sumamente original, tanto por su forma física como por sus usos, costumbres y régimen de vida, que indudablemente dará al traste con todos los sistemas de clasificación de los naturalistas, y que ni el Gran Cuvier podría clasificarlo. A primera vista parece conejo, pero se diferencia no obstante de este, en sus enormes colmillos y su régimen de alimentación; en vez del alimento vegetal o animal, usa exclusivamente de este último, pues se alimenta puramente de aves, prefiriendo entre estas las de corral, y entre las presas elige la cresta. Pero lo que más vá a confundir a los naturalistas para su clasificación es que perteneciendo indudablemente a una especie de conejos por su constitución está cubierto casi completamente de lana exactamente igual a la de las ovejas, pudiendo considerarse también como de esta familia tanto por esta propiedad como por lo sumiso y dócil al amo. Su hocico es ñato y deja ver dos grandes dientes semejantes a los de los roedores, pareciéndose mucho a los de la rata. Con tal retrato no dudamos que el tal gobernante hará roncha en la Capital y tendrá una comitiva constante cada vez que pasee las calles. Vendrá a la Exposición"

---

(La Patria Argentina, 16-I-1882, n.1112).

<sup>10871</sup> fundado en 1882 (Galván Moreno, 1944, 383); era de filiación independiente Irigoyenista, donde colaboraban los hermanos Gallo, prestigiosos periodistas Cuyanos (Rato de Sambucetti, 1980, 419 y 420).

<sup>10872</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>10873</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>10874</sup> Por empastelar se entiende mezclar o barajar las letras de un molde o galerada de modo que no formen sentido.

<sup>10875</sup> Bischoff, 1994, 113.

<sup>10876</sup> ver Garzón, 1915; Vélez, 1942; y Bischoff, 1994, 104.

<sup>10877</sup> Dermidio A. de Olmos a Juárez Celman, La Calera, 22-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Arch. MJC, Leg.18).

<sup>10878</sup> Urquiza Almandó, 1965, III, 328.

<sup>10879</sup> Niceo Acuña, Lisandro Olmos y Félix Avellaneda al Gran Comité Argentino, Catamarca, 20-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

<sup>10880</sup> Gómez, 1931, 95.

<sup>10881</sup> García Soriano, 1972, 27 y 37.

<sup>10882</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56). El Jefe de Policía había tratado de detener al autor del libelo pero el encargado de la Oficina de Enganche del Ejército lo impidió argumentando que dicho individuo se hallaba inscripto en la nómina del servicio (Bazán, 1992, 223).

<sup>10883</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57).

<sup>10884</sup> Juárez Celman a J. A. Roca, Buenos Aires, 1887, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57.

<sup>10885</sup> S. Linares a D. Rocha, Jujuy, 19-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>10886</sup> órgano Rochista, fundado en 1881 (Galván Moreno, 1944, 397).

<sup>10887</sup> Francisco Costas y José A. Chavarría a Dardo Rocha, Salta, 31-VIII-1885, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.

<sup>10888</sup> dirigido en 1885 por Ramiro Cañavares (Solá, 1924, 75-77; y Galván Moreno, 1944, 397).

<sup>10889</sup> Solá, 1924, 77.

<sup>10890</sup> Solá, 1924, 77.

<sup>10891</sup> Solá, 1924, 83.

<sup>10892</sup> fundada en 1876 (Galván Moreno, 1944, 359).

<sup>10893</sup> José S. Cáceres a V. de la Plaza, Corrientes, 8-IX-1884, Arch. V. de la Plaza, Leg.392. Sobre *La Libertad* de Corrientes, ver Buchbinder, 2004, 68.

<sup>10894</sup> Bischoff, 1971, 50-51; y Grenón, 1968, 311-313; citados en Cutolo, II, 286; y VII, 283.

---

<sup>10895</sup> dirigido en un principio por Agustín López (1885), luego por Emilio Carmona (1886), más tarde por Silvano Bores (1887), y finalmente en forma sucesiva por Félix Corrales (1888), Pedro Márquez (1889) y Martín Posse (1890). Desplazó a La Razón (ver García Soriano, 1972, 40-44).

<sup>10896</sup> García Soriano, 1972, 44.

<sup>10897</sup> para este tema, ver Marco, 1938; y Galván Moreno, 1944, 366. En Francia, Reddy (1994) detectó --de una lista de 175 periodistas-- que antes de 1850 once (11) periodistas habían participado en duelos, o casi el seis por ciento (6%). Para Reddy, el porcentaje debe haber sido mayor teniendo en cuenta que de acuerdo con Nye (1993) gran parte de los duelos se mantenían en secreto (Nye, 1993, 128-134; citado en Reddy, 1994, 1556). Posteriormente, en la década del treinta (1930), se debatió intensamente acerca de los delitos de imprenta o de prensa (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1935, I, 949-953).

<sup>10898</sup> reaparecido en su segunda época en 1876, bajo la dirección de Joaquín Carlés y José Borrás (Galván Moreno, 1944, 409). Lamentablemente la colección de este afamado periódico que existiera en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata ha desaparecido por la incuria de las autoridades responsables de su salvaguarda.

<sup>10899</sup> Ovidio Lagos a Víctor C. Lucero, Rosario, 22-XII-1883, en Lucero, 1931, 139.

<sup>10900</sup> a juicio de Toribio Mendoza, Rosario Suárez "...es un elemento pernicioso, y no conviene en un partido, ni como amigo, ni como enemigo, porque no sirve para nada, y como amigo es un charlatán y un comerciante. Suárez, no se ha ocupado de otra cosa desde que vino que de hacer política haciendo propaganda con la venida de Juan Saa, decía que venía autorizado por el Gobierno Nacional, para levantar un pie de Ejército y que ya estaba repuesto en su grado, y mil cosas por el estilo. Bien pues, Juan Saa, llegó el 12 del corriente, Suárez le preparó como pudo un recibimiento que le hiciera honor, sin embargo de no poder conseguir que fuera más jente que la de su familia que es numerosa y muchos de los soldados del batallón que mandó" (Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 24-XI-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Leg.13).

<sup>10901</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 1-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.51.

<sup>10902</sup> fundado en 1890 por Juan de Rosas y Eduardo Tessaire (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>10903</sup> Rufino Ortega a Juárez Celman, Mendoza, 18-III-1890, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.30.

<sup>10904</sup> Rufino Ortega a Juárez Celman, Mendoza, 18-III-1890, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.30.

<sup>10905</sup> omitido por Galván Moreno.

<sup>10906</sup> Luis J. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 18-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26.

<sup>10907</sup> Según Galván Moreno, el órgano oficial del Gobernador Rojas fué La Opinión Pública, redactado entre otros por Federico Alvarez y C. M. Maldonado. Para 1890, Rojas funda La Situación (Galván Moreno, 1944, 432).

<sup>10908</sup> Luis J. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 18-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26. Probablemente tratase de José G. Abalos, director de El Audaz, que circulara en 1877 o de Benjamín Abalos, redactor de La Prensa Libre, que circuló entre 1876 y 1880 (Galván Moreno, 1944, 432).

<sup>10909</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414). Existía en Montevideo un tal Francisco Susini, que mantuvo correspondencia con Teófilo Díaz (Inventario de los Fondos Documentales del Archivo General de la Nación, t.IV, Archivos Particulares (Montevideo, Uruguay, p.33).

<sup>10910</sup> Para un estudio del rol del New York Times en la elección presidencial de 1876 en Estados Unidos, ver Harmon (1987).

<sup>10911</sup> Casado con Enriqueta Lucio Lucero.

- 
- <sup>10912</sup> Ver Follari, 1978, 467.
- <sup>10913</sup> Toribio Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 6-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).
- <sup>10914</sup> ver Saguier (1993).
- <sup>10915</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 18-VI-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).
- <sup>10916</sup> marido de Eustolia de Iriondo Candioti, hermana del Gobernador de Santa Fé Simón de Iriondo (Cutolo, V, 530).
- <sup>10917</sup> futuro Diputado Nacional entre 1898 y 1900.
- <sup>10918</sup> padre o hermano del Senador Provincial por Totoral Pedro Vieyra Latorre Arias (SP.1902-06).
- <sup>10919</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 13-XII-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).
- <sup>10920</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 29-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).
- <sup>10921</sup> Botana, 1988, 38.
- <sup>10922</sup> Dirigido por el Dr. Pedro C. Molina. Los ejemplares de este periódico habrían desaparecido del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad de Córdoba, según lo denuncia Alfredo Díaz de Molina (Díaz de Molina, 1972, II, 558 y 571).
- <sup>10923</sup> Dirigida por Eleodoro Fierro.
- <sup>10924</sup> este periódico circuló entre 1886 y 1893 (Galván Moreno, 1944, 347).
- <sup>10925</sup> Julio Astrada a Julio A. Roca, Córdoba, 16-XII-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).
- <sup>10926</sup> Bajo la dirección de Zenón J. Santillán (1883) se enfrentó al gobierno de Benjamín Paz. Estando dirigido por Salvador Alfonso (1884) absorbió a El Republicano. Estaba crudamente enfrentado a El Orden, fundado por Ernesto Colombres y redactado por Pepe Posse (García Soriano, 1972, 21-25).
- <sup>10927</sup> Absalón Rojas a J. A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. Roca, Leg.9. García Soriano (1972) sostiene que sus fundadores fueron Pedro Alurralde y Lídero Quinteros, pero nada dice de su actividad en oportunidad de la campaña presidencial de Roca ni de la desplegada por Silvano Bores (García Soriano, 1972, 21-22).
- <sup>10928</sup> Absalón Rojas a J. A. Roca, Tucumán, 27-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.
- <sup>10929</sup> *Ibidm.* Para Pepe Posse, refiriéndose a Bores, "...ha querido ser pollo antes de pasar por el trámite de ser huevo". A Bores se le dió La Razón, "...para que tuviese que comer, y de repente se le metió en la cabeza ser Diputado contando con algunos votos de pulpería, para agitar la prensa contra todo el mundo, creyendo que con cintarazos de gaceta o de papel se echan a rodar gobiernos" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 3-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).
- <sup>10930</sup> *Ibidem.*
- <sup>10931</sup> Línor Quiroga al Gral. José M. Arredondo, San Luis, 24-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).
- <sup>10932</sup> Estanislao Zevallos a Juárez Celman, Rosario, 3-I-1886, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.24. Sobre el diario La Pampa, ver Massini Ezcurra, 1981.
- <sup>10933</sup> José Arnaled de Segovia a Dardo Rocha, Tucumán, 23-VIII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214.

---

<sup>10934</sup> apodado "Salta Perico" (García Soriano, 1972, 47).

<sup>10935</sup> hermano del jurista y político Rochista Angel Cruz Padilla y del que fuera político Juarista e Intendente de Tucumán, José Padilla (a) "Tres Papas".

<sup>10936</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 16-VIII-1885 y 16-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214.

<sup>10937</sup> nacido en Salta, hijo de Gabriel Augusto Lacoix Chanet, n. en Lyon en 1802, y de Francisca Paz de las Quintas, asesinado en 1909 en Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fé; y hermano menor de Salustio Lacroix, integrante de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

<sup>10938</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 22-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.

<sup>10939</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 12-III-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>10940</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 12-III-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>10941</sup> Esta práctica ha sido algo internacionalmente aceptado desde hacía tiempo (Young, 1969, 117).

<sup>10942</sup> Darío Arias a Juárez Celman, Salta, 30-III-1887, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.25.

<sup>10943</sup> Mariano Gorostiaga a Juárez Celman, Salta, 28-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17.

<sup>10944</sup> circuló entre 1881 y 1884 (García Soriano, 1972, 28).

<sup>10945</sup> García Soriano, 1972, 29. Su director fué durante un tiempo Uladislao Padilla.

<sup>10946</sup> Este diario es omitido por Galván Moreno.

<sup>10947</sup> diario de la tarde, fundado en 1882 (Galván Moreno, 1944, 418).

<sup>10948</sup> Antenor Pita a Victorino de la Plaza, Rosario, 15-X-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393.

<sup>10949</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Buenos Aires, 21-XI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.73.

<sup>10950</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Buenos Aires, 21-XI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.73.

<sup>10951</sup> fundado en 1884 (Galván Moreno, 1944, 383).

<sup>10952</sup> Héctor C. Quesada a Juárez Celman, Mendoza, 7-VIII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.

<sup>10953</sup> Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>10954</sup> omitido por Galván Moreno (1944).

<sup>10955</sup> M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 24-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>10956</sup> Angel Soto a J. Roca, Corrientes, 19-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>10957</sup> dirigido por Félix Avellaneda, circuló entre 1883 y 1886 (Galván Moreno, 1944, 331).

<sup>10958</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 19-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

- 
- <sup>10959</sup> Bischoff, 1994, 93.
- <sup>10960</sup> Duncan, 1980, 774.
- <sup>10961</sup> periódico fundado en 1875 (Galván Moreno, 1944, 397).
- <sup>10962</sup> Mariano Gorostiaga a M. Juárez Celman, Salta, 27-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003214.
- <sup>10963</sup> Mariano Gorostiaga a M. Juárez Celman, Salta, 27-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, No.003214.
- <sup>10964</sup> Gobernador de Córdoba entre 1874 y 1877 (Cutolo, VI, 280).
- <sup>10965</sup> Enrique Rodríguez a Juárez Celman, Rosario, 13-V-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.
- <sup>10966</sup> Luis Vélez Berroarán a Juárez Celman, Rosario, 16-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.
- <sup>10967</sup> ver Scharlott, 1989. En la Argentina lo prueba la enorme lista de periódicos titulados El Telégrafo o vinculados a la telegrafía. En Catamarca, El Andino que circuló entre 1876 y 1881 y El Trasandino dirigido por Segundo Acuña. El Telégrafo salió uno en Córdoba en 1853, otro en Concepción del Uruguay, otro en Mendoza en 1822, y otro en San Luis entre 1870 y 1875 (Galván Moreno, 1944, 331, 345, 369, 381 y 409).
- <sup>10968</sup> Halperín Donghi, 1985, 174; y Bonaudo y Sonzogni, 1992, 97.
- <sup>10969</sup> Eleázar Garzón a Julio A. Roca, Córdoba, 9-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).
- <sup>10970</sup> *Ibidem*.
- <sup>10971</sup> *Ibidem*.
- <sup>10972</sup> *Ibidem*.
- <sup>10973</sup> *Ibidem*.
- <sup>10974</sup> *Ibidem*.
- <sup>10975</sup> se hizo cargo en 1905 de la dirección de La Montaña y a fines de dicho año le cambió el título llamándolo El Liberal (Solá, 1924, 82-83).
- <sup>10976</sup> Antonino Díaz a J. Roca, Salta, 14-VIII-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.73.
- <sup>10977</sup> B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69.
- <sup>10978</sup> a partir de 1885, cuando tenía 37 años de edad, fué reportero de El Orden (García Soriano, 1972, 32).
- <sup>10979</sup> sobrino carnal de Antonino y Manuel Taboada.
- <sup>10980</sup> hijo del Inspector Pablo Lascano y de María de Jesús Gorostiaga, sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga.
- <sup>10981</sup> B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69.
- <sup>10982</sup> Benito Pérez a J. Roca, Paraná, 21-XI-1899, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.90.
- <sup>10983</sup> Francisco Civit a J. Roca, Mendoza, 21-VIII-1900 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.94).

- 
- <sup>10984</sup> Barraquero, 1926, 430.
- <sup>10985</sup> yerno de Don Carlos González.
- <sup>10986</sup> Barraquero, 1926, 430.
- <sup>10987</sup> Francisco V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 8-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50.
- <sup>10988</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento (Carmagnani, 1988, 12).
- <sup>10989</sup> J. Villanueva a J. Roca, Río Cuarto, 4-II-1886, Archivo General de la Nación (AGN), Arch. Roca, Leg.50.
- <sup>10990</sup> Amadeo Benítez a Roca, San Nicolás, 27-III-1877, Arch. Roca, Leg.4.
- <sup>10991</sup> Hermógenes Ruiz a J. Roca, San Juan, 14-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.
- <sup>10992</sup> Román Videla a J. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.
- <sup>10993</sup> Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 4-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.
- <sup>10994</sup> Rosauro Doncel a J. Roca, San Juan, 3-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.
- <sup>10995</sup> T. Mendoza a J. Roca, San Luis, 21-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6.
- <sup>10996</sup> permítaseme citar a Saguier (1995), (1997a) y (1997b).
- <sup>10997</sup> En el repositorio documental del Gral. Agustín P. Justo, existente en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, abundan esta clase de Partes Mensuales, con nutrida información para cada Distrito.
- <sup>10998</sup> José U. Fernández a Victorino de la Plaza, Paraná, 14-XI-1883, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.388.
- <sup>10999</sup> J. Ocampo a J. Roca, La Rioja, 11-VIII-1884, Arch. Roca, Leg.40.
- <sup>11000</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 27-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.
- <sup>11001</sup> ignoro sus nombres, aunque sospecho de Clementino y Bernardo Colombres y de Ignacio Colombres Gutiérrez, todos ellos Diputados Provinciales en 1883 y primos políticos y cuñados del Gobernador Benjamín Paz.
- <sup>11002</sup> Pedro López a Juárez Celman, 27-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.
- <sup>11003</sup> Podría ser hijo o hermano de un tal Pedro Solivarez, director de un periódico bisemanal denominado La Prensa, fundado en Salta en 1861 (Galván Moreno, 1944b, 397); o de un tal Emilio Soliveres, gerente de un diario de Salta, aparecido en 1895, denominado La Actualidad, órgano del Partido Nacional (Solá, 1924, 81).
- <sup>11004</sup> era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavidez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65).
- <sup>11005</sup> Pedro López a Juárez Celman, 27-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.
- <sup>11006</sup> nacido en Salta, hijo de Gabriel Augusto Lacroix Chanut, n. en Lyon en 1802, y de Francisca Paz de las Quintas, asesinado en 1909 en Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fé; y hermano menor de Salustio Lacroix, integrante de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

---

<sup>11007</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>11008</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>11009</sup> Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

<sup>11010</sup> Luis del Carril a Dardo Rocha, Salta, 20-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.

<sup>11011</sup> marido de María de Jesús Gorostiaga, prima hermana de Manuel y Antonino Taboada y tía carnal del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, y padre "...de una numerosa falange de jóvenes inteligentes que nos ayudaron mucho, uno de ellos [Pablo] es redactor de El Progreso de Córdoba, otro es Secretario del Comité [Rochista] aquí" (Jaime Vieyra a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 1-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>11012</sup> había sido Director de El País de Santiago del Estero y del Diario Popular de Salta, Inspector General de Escuelas, Gerente del Banco Hipotecario de Santiago del Estero y Presidente del Banco Provincial (Cutolo, III, 410). Era primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz, y marido de una prima hermana de Roca y de Paz, llamada Plácida Figueroa Paz.

<sup>11013</sup> Absalón Rojas a J. Roca, S. del Estero, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>11014</sup> desempeñó el cargo desde 1880 a 1887 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

<sup>11015</sup> Absalón Rojas a J. Celman, S. del Estero, 3-XI-1885, Arch. J. Celman, Leg.19.

<sup>11016</sup> Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

<sup>11017</sup> Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

<sup>11018</sup> Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

<sup>11019</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Buenos Aires, 21-XI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.73.

<sup>11020</sup> desempeñó el cargo entre 1891 y 1898 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

<sup>11021</sup> Ibidem.

<sup>11022</sup> Ibidem.

<sup>11023</sup> Para el caso inglés, ver Robinson (1948, 1970); para el de los Estados Unidos, ver Plum (1882, 1974), Du Boff (1984), Tarr (1987), Scharlott (1989) y Graham (1990); para el de China, ver Cheng (1970); y para el de Chile, ver Johnson (1948).

<sup>11024</sup> Friedland, 1996, 185.

<sup>11025</sup> Friedland, 1996, 186.

<sup>11026</sup> Luhmann, 1995, 11.

<sup>11027</sup> Morin, 1992, IV, 64-70.

<sup>11028</sup> ver Saguier, 1995a y 1996-1997.

<sup>11029</sup> ver Saguier, 1995b.

<sup>11030</sup> Telasco Castellanos a Roca, Santiago del Estero, 10-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

- 
- <sup>11031</sup> Absalón Rojas a Roca, Belgrano, 7-VII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11.
- <sup>11032</sup> Cané desempeñó el cargo de Director General de Correos desde junio del 1880 a octubre del 1880 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).
- <sup>11033</sup> Ojeda a Roca, 1-VIII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11. "...La noche que tu me llamaste al telégrafo tuve que hacer venir al Inspector Ugarte para que llevara el aparato porque solo él podía hacerlo sin la intervención superior" (Ojeda a Roca, 1-VIII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11).
- <sup>11034</sup> Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.
- <sup>11035</sup> Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.
- <sup>11036</sup> fué el primer Director General de Correos y Telégrafos, desempeñando el cargo desde 1876 a 1880 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).
- <sup>11037</sup> Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.
- <sup>11038</sup> Miguel M. Nougués a Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18.
- <sup>11039</sup> Miguel M. Nougués a Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18.
- <sup>11040</sup> J. A. Roca J. Celman, 26-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.9.
- <sup>11041</sup> O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, Arch. Roca, Leg.41.
- <sup>11042</sup> Mendoza, 22-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.
- <sup>11043</sup> José M. Fernández a Roca, Salta, 19-VI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23.
- <sup>11044</sup> Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 15-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).
- <sup>11045</sup> Pío Uriburu a Dardo Rocha, Salta, 10-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.
- <sup>11046</sup> Simón Derqui a Dardo Rocha, Concordia, 3 y 12-III-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).
- <sup>11047</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 1-IX-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.
- <sup>11048</sup> Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de El Uruguay y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandó, 1965, II, 380, 532; III, 257 y 328).
- <sup>11049</sup> J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.
- <sup>11050</sup> J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.
- <sup>11051</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 16-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.
- <sup>11052</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.
- <sup>11053</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.
- <sup>11054</sup> Barraquero, 1926, 473 y 435.
- <sup>11055</sup> José Fernández López a Juárez Celman, Buenos Aires, 9-VII-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22. José del Viso en carta a J. Celman dice que "...los originales de esos telegramas serán los que se lean [en la Cámara]. Será fácil que se produzca con este motivo una moción de juicio criminal, al autor de esa violación de correspondencia, si es verdad que la hay, cuyo juicio deberá comenzar por el Diputado que

---

presente esos despachos" (José del Viso a Juárez Celman, Buenos Aires, 17-VI-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

<sup>11056</sup> Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Ostende, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58).

<sup>11057</sup> Justino Solari a Roca, Corrientes, 25-II-1891, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.62.

<sup>11058</sup> Agrimensor, hijo de Félix Garzón y Rosales, y de Juana Luisa Duarte Olivera y Caballero, hermano del Gobernador Delegado y Diputado Nacional Tomás Garzón Duarte Olivera, tío del Gobernador de Santiago del Estero Dámaso E. Palacio Achával, con cuñado del Diputado Nacional Francisco de Paula Moreno Cabral, y suegro de su sobrino el Gobernador Félix T. Garzón y Moreno. Estaba casado con Carmen Gómez Argüello, natural de La Punilla, hija de Toribio Gómez y de Eloísa Argüello (Cutolo, III, 269; Gómez, 1990, 13; y Lazcano, I, 221).

<sup>11059</sup> Eleázar Garzón a Julio A. Roca, Córdoba, 9-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>11060</sup> Flavio Castellanos a J. Roca, Catamarca, 3-XII-1897, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

<sup>11061</sup> ver telegramas en clave enviados entre Luis del Carril y Martín G. Güemes y Manuel M. Zorrilla (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.218).

<sup>11062</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>11063</sup> Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26).

<sup>11064</sup> Lúndor Quiroga al Gral. José M. Arredondo, San Luis, 24-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, L.214).

<sup>11065</sup> B. Domínguez a Roca, Córdoba, 18-IV-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59. Desempeñó el cargo de Director General desde IV-1887 a VIII-1890 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

<sup>11066</sup> Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 20-XII-1885, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.214.

<sup>11067</sup> O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, Arch. Roca, Leg.41.

<sup>11068</sup> O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.41.

<sup>11069</sup> Juan Cristensen a V. de la Plaza, Santiago de Chile, 8-IV-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.390.

<sup>11070</sup> ver Johnson, 1948.

<sup>11071</sup> Pedro López a J. Celman, 28-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

<sup>11072</sup> Duncan (1980) relata como Ramón J. Cárcano se valía de un servicio telegráfico especial para transmitir al periódico Sud-América (Buenos Aires) los discursos, resoluciones y listas de socios del Juarismo (Duncan, 1980, 772).

<sup>11073</sup> Beltrán, 1943, 295; Galván Moreno, 1944b, 345, 369, 381 y 409; y Bischoff, 1994, 89.

<sup>11074</sup> Galván Moreno, 1944b, 331.

<sup>11075</sup> D. E. Palacio a Julio A. Roca, Córdoba, 18-XII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>11076</sup> Eleázar Garzón a Julio A. Roca, Córdoba, 12-XII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>11077</sup> Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-

<sup>11078</sup> Pedro López a Roca, 1-XII-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

<sup>11079</sup> Sommariva, 1931, II, 114. Es sabido que Julio A. Roca se resistió a apoyar a su hermano Rudecindo --desacreditado por su rol en la destitución del Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino-- como candidato a Gobernador de Corrientes, en lugar de Manuel Derqui (ver carta de Benito Cook a Roca, Paso de los Libres, 28-III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

<sup>11080</sup> Fernández Lalanne, 1989, 75 y 79.

<sup>11081</sup> Hijo de Domingo Eugenio Villafañe y de Lorenza Gordillo Castro (Cutolo, VII, 636).

<sup>11082</sup> Hijo de Domingo Eugenio Villafañe Gordillo y de Lorenza Gordillo Castro, casado con Josefa Restituta Ortiz de Ocampo, suegro de Aurelio Carreño, y tío político del Gobernador Salvador de la Colina Villafañe, y del Diputado Nacional Rafael Igarzábal Ortiz de Ocampo (Cutolo, VII, 636; y Serrano Redonnet, 1979, 194).

<sup>11083</sup> Di Tella y Zymelman, 1973, 66-67.

<sup>11084</sup> Para explicar la corrupción política existente en los Estados Unidos, Meier y Holbrook (1992) utilizan cuatro indicadores histórico-culturales: 1) urbanismo, 2) preferencias de clase media, 3) inmigración, y 4) actividades criminales. Los ambientes urbanos son propicios para la corrupción política debido a los débiles lazos que sus poblaciones mantienen con la familia y la religión (Meier y Holbrook, 1992, 138 y 139).

<sup>11085</sup> Prakash, 1990, 385.

<sup>11086</sup> por Antiguo Régimen Colonial entendemos una sociedad etno-céntrica, nepótica, estamental, corporativa, patrimonial y señorial. Al respecto, esta obra es prolongación de otra en ocho tomos titulada "La Inconclusa Revolución de Independencia. El Antiguo Régimen colonial-absolutista y la genealogía de su supervivencia", compuesta de cuarenta capítulos, cuya mitad se hallan publicados en distintas revistas del mundo, rescencionados en el Handbook of Latin American Studies (HLAS) y registrados en el Historical Abstracts (Santa Barbara, CA), y en el Hispanic American Periodical Index (HAPI) (Latin American Center, Univ. of Calif., Los Angeles).

<sup>11087</sup> Botana, 1977, 161. Para sostener esta tesis se inspiró en las obras de Taine, Lilienfeld y Schaffle, incursionando sobre la temática de la herencia, en sus tres manifestaciones sociológicas: la del prestigio, el patrimonio y el poder. Probablemente se inspiró también en las teorías neo-darwinistas de la herencia zoológica y fisiológica (Haeckel, Naegeli, Weismann, Vries, Haacke) y en la noción de survival, o supervivencia, acuñada por Edward Tylor y repetida por el darwinismo social y la etnología comparada de Morgan, Bagehot, Spencer, Frazer y Mc Lennan (Harris, 1979, 141-145; y Barnes y Becker, 1984, 717-723). Como las teorías neo-darwinistas fueron leídas y admiradas en sus tiempos jóvenes por antropólogos de la talla de Robert Lowie, no es de extrañar que también fueren frecuentadas por científico-políticos como Grasserie (Harris, 1979, 255). De hecho, en Chicago, el sociólogo Thorstein Veblen, fundador del Institucionalismo, se

---

inspiró para su obra maestra sobre la clase ociosa en Tylor, ver Dawson, 1993.

<sup>11088</sup> Ramos, 1970, 151.

<sup>11089</sup> Lohmann Villena, 1974, LIV.

<sup>11090</sup> Botana, 1977, 204, nota 3. Para nuestro análisis, la portación de un mismo apellido por dos gobernadores, senadores, o diputados, no garantizaba la existencia de nepotismo u oligarquía, el cual para que causara efectos políticos, y poder ser así caracterizados como tales, debía estar al menos dentro del cuarto grado de consanguinidad o dentro del segundo grado de afinidad. En ese sentido, era más próximo el parentesco entre cuñados, concuñados, consuegros, y entre suegros y yernos, que como es obvio no portaban el mismo apellido, que entre aquellos que sí lo llevaban. Por otro lado, si bien Botana reserva a los parentescos una sección de su obra, le asigna sin embargo a éstos sólo el carácter de supervivencias o "sedimentos persistentes de la tradición señorial" (Botana, 1977, 161. Igual opinión tuvieron el Diputado Nacional Delfín Gallo en ocasión de la Intervención a Corrientes en 1878, y el Diputado Nacional Andrónico Castro en oportunidad de la Intervención a Tucumán en 1893.

<sup>11091</sup> Si las hermanas que se intercambiaban para desposar eran también sus primas la alianza se consolidaba aún mas. Es así que, cuando los clanes familiares se superponían entre facciones políticas antagónicas, el matrimonio consanguíneo y el parentesco servían como elementos disuasorios del conflicto. Y, cuando por el contrario, los clanes familiares se polarizaban entre facciones políticas opuestas, el conflicto se acentuaba.

<sup>11092</sup> Si las hermanas que se intercambiaban para desposar eran también sus primas la alianza se consolidaba aún mas. Es así que, cuando los clanes familiares se superponían entre facciones políticas antagónicas, el matrimonio consanguíneo y el parentesco servían como elementos disuasorios del conflicto. Y, cuando por el contrario, los clanes familiares se polarizaban entre facciones políticas opuestas, el conflicto se acentuaba.

<sup>11093</sup> Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver Deleuze, 1987, 56.

<sup>11094</sup> ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997.

<sup>11095</sup> hijo de Manuel Antonio Figueroa y Sosa y de Romualda Herrera y Acuña, casado con Rosario Ferrari Díaz, hermano del Diputado Nacional Marcos Figueroa Herrera, padre del Diputado Nacional Alberto F. Figueroa, y primo hermano del Gobernador Manuel Navarro Herrera y del General Octaviano Navarro Herrera. Fué propietario del diario "El Pueblo".

<sup>11096</sup> perteneciente a la afamada Casa Molina, mayoristas y monopolistas de todo el comercio de Catamarca.

<sup>11097</sup> Francisco Figueroa a J. Roca, Catamarca, 6-I-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>11098</sup> abuelo materno del historiador Alfredo Díaz de Molina.

---

<sup>11099</sup> Francisco Caracciolo Figueroa a V. de la Plaza, Catamarca, 29-X-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.288).

<sup>11100</sup> Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1892, 6a sesión ordinaria, p.170.

<sup>11101</sup> hijo natural de Gila Escalante. Se cuenta que ya adolescente, su padre quiso reconocerlo y darle su apellido, a lo cual Wenceslao Escalante se negó, conservando el apellido de su madre (versión libre de Carlos Jáuregui Rueda).

<sup>11102</sup> Allende, 1964, 400.

<sup>11103</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1894, 2a. Sesión de Prórroga, p.100.

<sup>11104</sup> Hijo de Próspero Andrés Herrera y de su segunda esposa Azucena Gonsález Boter Díaz de la Peña, y casado con Carmen Castellanos Díaz de la Peña, hermana del que fué el Gobernador Flavio Castellanos Díaz de la Peña, y doble prima hermana del Presidente de la Legislatura Adolfo Castellanos Díaz de la Peña.

<sup>11105</sup> Hijo del Gobernador José Pío Cisneros y de Anastasia Sánchez de Loria.

<sup>11106</sup> Vinculado por su madre al clan de los Díaz de la Peña, y primo hermano político del Diputado Nacional Julio Herrera Gonsález.

<sup>11107</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 2a. Sesión de Prórroga, 1894, p.100.

<sup>11108</sup> *Ibidem*.

<sup>11109</sup> *Ibidem*.

<sup>11110</sup> José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 22-VI-1896 (Archivo General de la Nación [AGN], Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>11111</sup> *Ibidem*.

<sup>11112</sup> hijo del Senador Provincial Mauricio Herrera.

<sup>11113</sup> José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 22-VI-1896 (Archivo General de la Nación [AGN], Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>11114</sup> *Ibidem*.

<sup>11115</sup> José V. García a J. A. Roca, Catamarca, 10-VII-1896 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.72).

<sup>11116</sup> Juan J. Ibáñez a Julio A. Roca, Catamarca, 14-VIII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.73).

---

<sup>11117</sup> *Ibídem.*

<sup>11118</sup> José V. García a Julio A. Roca, Catamarca, 5-IX-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.81).

<sup>11119</sup> La Comisión Directiva de la Unión Provincial quedó compuesta por: Joaquín Acuña, Gustavo Ferrari, Javier Castro, Federico Espeche, Guillermo Correa, y Teodulfo Castro.

<sup>11120</sup> Dicho manifiesto decía: "...Veinte mil Catamarqueños ausentes de sus hogares, las industrias agonizantes y el comercio próximo a extinguirse, han debido convencer a los hombres que nos gobiernan, que sus sistema liberticida, irrespetuoso de la opinión, indiferente a las desgracias que aniquilan a la provincia, y consagrado a servir el sensualismo de una familia, es mortal para el progreso y las instituciones que garantizan el ejercicio de la libertad civil y política. Denunciando el fraude o la malversación, ha premiado al culpable estimulando su delincuencia: reclamada la publicación de la inversión de la renta pública como lo ordena la Constitución Nacional, se ha encastillado en silencio sospechoso: muchos miles de pesos han desaparecido de las arcas ignorándose su destino. La campaña clama contra las confabulaciones de jueces, comisarios y receptores organizadas para la expoliación, el régimen judicial desprestigiado en su más alta jerarquía, no goza de la independencia que requiere sus funciones, porque sus miembros o siguen la suerte del Poder Ejecutivo de la familia o no se les abona sus sueldos, cadena con la que se ata y humilla la distribución de la justicia, el juicio político contra los funcionarios del estado revestido de inmunidades es imposible, porque la cámara que acusa, la que juzga, y el inculpado dependen exclusivamente del jefe del estado y de la familia, que toma sobre sí el juicio y la sentencia, haciendo inútil todo procedimiento, para la representación nacional no se consulta el mérito sino el parentesco (La Nación, 29-XII-1898).

<sup>11121</sup> El Diario, 24 y 25-IX-1899; y Bazán, 1992, 230-231. Para el periódico El Diario, el nepotismo estrecho es "...lo que dió origen a la sublevación general de la provincia, determinando el sangriento y estéril episodio de la revolución reciente --la cual ya no fue tan popular como debiera porque se puso al frente de esta reacción, con ojo vivaz de albatros que sabe cernirse sobre las tempestades, y utilizando su posición y vinculaciones nacionales, el Senador Figueroa, generador de la genealogía --el cual como un sañado y voraz Saturno de tierra adentro, devoraba sus hijos por que no habían sabido conducir las cosas de modo bastante acertado para asegurarle su reelección" (El Diario, 23-II-1900).

<sup>11122</sup> Benjamín Figueroa a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1899, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.90.

<sup>11123</sup> Sommariva, 1931, II, 298; y Olmos, 1967, 51.

<sup>11124</sup> *Ibídem.*

<sup>11125</sup> cuñado del industrial azucarero tucumano Clodomiro Hileret.

<sup>11126</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión ordinaria, 25-IX-1899, pp. 912 y 913.

---

<sup>11127</sup> primo hermano del Diputado Nacional Lídoro J. Avellaneda Villegas (DN. 1896-1900).

<sup>11128</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión Ordinaria, 25-IX-1899, p.911.

<sup>11129</sup> *Ibidem*.

<sup>11130</sup> Médico. Amigo del Chacho Peñaloza. Asistió a los heridos en el sitio de 1862. Fué cómplice del ex-Gobernador Manuel Vicente Bustos en la rebelión de los Llanos de 1865 contra el Gobernador Julio Campos (Reyes, 1916, 105; y Bazán, 1992, 122 y 126). Era suegro del Coronel Hilario Lagos y de los Gobernadores Francisco Vicente Bustos y Baltasar Jaramillo.

<sup>11131</sup> Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 24-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>11132</sup> "...por que no podemos fiar en su lealtad, y por que, dadas las resistencias que tiene y el odio y desprecio que inspira, sería poner a la oposición en aptitud de luchar" (Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 29-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>11133</sup> hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien había descollado en la defensa de La Rioja contra el sitio del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa Gonsález, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro (Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era tío del Diputado Nacional José María Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos, y primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera.

<sup>11134</sup> Pizarro, 1883, 34. Con motivo del gobierno de Bustos, Rafael de la Plaza le informaba a su hermano Victorino que la situación de La Rioja es "...un gobierno rodeado de 8 o 10 personas de su familia y entregado de cuerpo y alma a Juárez Celman" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, La Rioja, 21-VII-1882, AGN, Sala VII, Archivo Victorino de la Plaza, 5-1-4, fs.663). La conducta de Bustos no era entonces muy clara, pues a juzgar por las expresiones de Julio Achával a su hermano Tristán "...está entregándose por completo a Francisco Alvarez y los Jaramillos a quienes maneja [su yerno el Coronel Hilario] Lagos" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10). La razón de este proceder "...son los amores de Bustos con la hija de Alvarez pues dicen que se casa" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10). Si bien esta conducta no podía traerle perjuicio alguno a Juárez Celman, "...porque creo que Bustos en esta parte cumplirá su palabra y la cumplirá aunque no quiera" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10), traía sin embargo "...mucho malestar aquí pues los Jaramillos y Alvarez son muy mal queridos" (Julio Achával a Tristán Achával, La Rioja, s/f, Archivo Juárez Celman (AJC), Leg.10).

<sup>11135</sup> Pizarro, 1883, 83-153, citado por Díaz de Molina, 1972, I, 173. Todo el empeño demostrado por Bustos para dejar como sucesor a Jaramillo era según Natal Luna

---

"...porque se casa pronto con una sobrina de este a más de ser cuñado, cuestión de faldas" (Natal Luna a Miguel Juárez Celman, La Rioja, 9-X-1882, AJC, Leg.10).

<sup>11136</sup> Era dueño de un area de 26 leguas de campo, "...los mejores que tiene la provincia, sobre las líneas férreas" (Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 18-IX-1892, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>11137</sup> Bazán, 1992, 221.

<sup>11138</sup> Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

<sup>11139</sup> Bazán, 1967, 652.

<sup>11140</sup> Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 14-VI-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.78).

<sup>11141</sup> según Guillermo San Román, Joaquín V. González soñaba no sólo en ser Diputado al Congreso Nacional, "...sino dejar un sucesor de su familia política [Leónidas Carreño], que continúe devorando los últimos despojos de este cadáver, que se llama gobierno de La Rioja" (Guillermo San Román a Julio A. Roca, La Rioja, 20-IX-1891, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>11142</sup> Bazán, 1979, 533-35.

<sup>11143</sup> Bazán, 1979, 539.

<sup>11144</sup> Arcadio de la Colina a J. A. Roca, La Rioja, 6-II-1903, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.101.

<sup>11145</sup> ver Reyes, 1915, 67-81. La tesis doctoral presentada por César Reyes en la Universidad de Córdoba, fué rechazada, a juicio del Diputado Nacional Juan B. Justo, "...porque traía una cita de Alberdi en que se empleaba una palabra que no fué del agrado de los señores de la Universidad de Córdoba. En esa tesis el Dr. César Reyes sostenía principios nuevos y abiertos de democracia, de verdad administrativa, de pureza del sufragio, de verdad en la enseñanza, y condenaba a fondo el verbalismo y la falsedad de la pretendida ciencia que se enseñaba en Córdoba" (Exposición del Diputado Nacional Dr. Juan B. Justo, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 30, 29-VII-1918, II, p.542).

<sup>11146</sup> Bazán, 1967, 660.

<sup>11147</sup> hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y tío del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396).

<sup>11148</sup> Bazán, 1967, 662. Ver entretelones sobre el doble Colegio Electoral establecido en La Rioja, en la exposición del Diputado Nacional por San Juan Carlos Conforti, Diario de Sesiones, 1910, I, Reunión n.12, 10 de Junio de 1910, 152-161.

---

<sup>11149</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15.

<sup>11150</sup> Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 12-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>11151</sup> ambos se habían destacado por ser acérrimos Rochistas.

<sup>11152</sup> José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891, (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>11153</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>11154</sup> Pedro B. Medina a Julio A. Roca, Taí, 21-I-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>11155</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 21-XII-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Pedro Méndez era tío carnal materno de Alfredo Guzmán y socio de Ernesto Tornquist.

<sup>11156</sup> Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 20-XI-1894 (AGN, Archivo Roca, Leg.68).

<sup>11157</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>11158</sup> cuñado de Delfín Gigena.

<sup>11159</sup> sobrino de Miguel Nougués, "...quien según los liberales entregó el poder a los titulados mazhorqueros" (Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893, AGN, Archivo Roca, Leg.67).

<sup>11160</sup> hijo del Gobernador Juan Manuel Terán Alurralde y de Hipólita Silva Zavaleta, hermano del Diputado Nacional Juan Manuel Terán Silva, y tío carnal del historiador Juan B. Terán Lacavera y del Gobernador Juan L. Nougués Terán y del "Rey del Azúcar Juan Carlos Nougués Terán.

<sup>11161</sup> cuñado de Clodomiro Hileret. Dueño del Ingenio "La Amalia".

<sup>11162</sup> Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 20-XI-1894 (AGN, Archivo Roca, Leg.68).

<sup>11163</sup> Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.80).

<sup>11164</sup> sobre su gestión con respecto a los intereses azucareros, ver su carta a J. Roca, Tucumán, 5-VI-1897 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.75).

<sup>11165</sup> nacido en 1862, hijo natural de un Posse, y marido de Teresa Lacavera Cainzo (Cutolo, IV, 520). Era cuñado del Diputado Nacional Pedro Lacavera Cainzo, y concuñado

---

del Senador Nacional Brígido Terán Silva.

<sup>11166</sup> nació en Tucumán en 1850, hijo de Carlos Olmos y de Teresa Heredia, y marido de Evarista Maciel (Cutolo, V, 162).

<sup>11167</sup> Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 184.

<sup>11168</sup> Dueño del Ingenio San José, hijo de Justiniano Frías Gramajo y de Clemencia Silva Zavaleta, y marido de Isolina Zavalía López. Era hermano del Diputado Nacional Raúl Frías Silva.

<sup>11169</sup> Hijo de Manuel José Padilla de la Puente, y de Josefa Nougues Romero, marido de Elvira Salvatierra Frías; y cuñado del Diputado Nacional Federico Helguera Molina (DN.1900-04).

<sup>11170</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.63, 20-XI-1911, p.265.

<sup>11171</sup> *Ibidem*.

<sup>11172</sup> hijo del Gobernador Saturnino Manuel de Laspiur y de la Quintana (GP.1848); y sobrino de los Gobernador Cnel. José María Oyuela Negrón (GD.1841/43); y Manuel José Gómez Rufino (Videla, 1962-90, IV, Cap.VIII, p.523).

<sup>11173</sup> marido de María Mercedes Leániz, perteneciente al extinguido clan de los Allende, por ser bisnieta de María de Allende y Losa (Cuadro COR-I).

<sup>11174</sup> Díaz de Molina, 1972, I, 49; y Terzaga, 1976, I, 125.

<sup>11175</sup> Saturnino Laspiur a Marcos Paz, Córdoba, 18-IX-1865 (Archivo del Coronel Doctor Marcos Paz, 1959, IV, 172).

<sup>11176</sup> Cárcano, 1969, 94.

<sup>11177</sup> Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano del Senador Provincial Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno Escuti, y primo hermano político del Presidente Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284).

<sup>11178</sup> Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238.

<sup>11179</sup> En orden de aparición: Luis Warcalde Padilla, Senador Provincial por Ischilín (1871-73) y Diputado Nacional (1872-80); Félix Funes Díaz, Senador Provincial por Tercero Abajo (1884-92; 1903-07); Emilio Díaz Igarzábal, Senador Provincial por Tercero Arriba (1896-08); Calixto S. de la Torre González, Senador Nacional (1898-01); José Xavier Díaz Allende, Senador Provincial por Cruz del Eje (1901-09); el Gobernador Pedro J. Frías Díaz Allende, Senador Provincial por Río Primero (1919-26); Carlos Alberto Díaz Gavier, Senador Provincial por Río Primero (1920-28); Roberto A. Díaz Pizarro, Senador Provincial por Tercero Abajo (1934-38); Ernesto Díaz Yofre, Senador Provincial por Tercero Abajo (1938-42).

---

<sup>11180</sup> hijo de Manuel José de Ocampo y Navia y de Ursula Gonsález y Arias de Cabrera; marido de Clara Lozano Samayoa; y concuñado del político e historiador Vicente Fidel López.

<sup>11181</sup> para El Diario, Alvarez era un "...espíritu apagado, pacato, en ese limbo de la mediocridad que permite en muchos hombres prometer mucho sin producir nada; flaco de cuerpo y aún más de ánimo, es en fin un hallazgo que solo la suspicacia del Gral. Roca y su refinada arteria política ha podido encontrar para mistificar a todas las ambiciones. Para complemento el Sr. Alvarez es sordo como tapia: la mitad del camino andado para la suprema beatitud" ("Córdoba", El Diario, 30-VI-1900). En realidad, Alvarez fue elegido Gobernador por ser cuñado del Ministro del Interior Felipe Yofre. Para más detalles sobre la gobernación de Alvarez, ver Bischoff, 1995, 375-378.

<sup>11182</sup> Para el ex-Gobernador de Córdoba Gregorio Gavier, la designación de Figueroa Alcorta como candidato "...me halaga como cordobés y como amigo particular suyo. Que mas podría desear esta Provincia que no quedar huérfana en la nueva fórmula presidencia! Pero si el candidato es muy bueno intrínsecamente, el círculo de familia que aquí lo rodea no satisface a nadie porque no tiene otro propósito que medrar, usando para ello de la intriga y de la mentira. Hace tres días que se produjo el cambio de gobierno y la designación de candidato a la Vice-Presidencia y ya lo tenemos en campaña con el anuncio de una interpelación al Ministro de Hacienda, al que según parece se desea sustituir con persona muy íntima del círculo mencionado" (G. Gavier a J. Roca, Córdoba, 20-V-1904, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11183</sup> Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano del Senador Provincial Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno Escuti, y primo hermano político del Presidente Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284).

<sup>11184</sup> G. Gavier a J. Roca, Córdoba, 20-V-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11185</sup> J. V. Olmos a J. Roca, Córdoba, 21-V-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69).

<sup>11186</sup> primo hermano político del Gobernador Tucumano Ernesto Padilla Nougués (Tuc.1913-17); y tío político del Diputado Nacional Isidoro Ruiz Moreno Urquiza (DN.1908-12).

<sup>11187</sup> Melo, 1964, 121. A causa de estos excesos "...de ambición aplicados de esta forma, llevada la nación con todo su imperio a gravitar sobre la autonomía de las provincias, es claro que siempre desaparecerá la autonomía de la provincia. Así sucedió en la provincia de Corrientes, en donde se eliminó al Gobernador Juan Estéban Martínez, aquel gobernador eximio, cuyas grandes virtudes ciudadanas fueron cantadas después, ostentosamente por sus mismos adversarios. Así ha caído el Gobernador Estéban P. Adaro en la provincia de San Luis, que según entiendo ha sido destituido por incapaz, por un decreto, sin siquiera requerirse un examen médico (Risas). Así parece que vá a ocurrir en la provincia de Córdoba, con el Gobernador José A. Ortiz y Herrera, caballero muy distinguido, muy honorable, pero que no conjuga con la idea del personalismo imperante hoy día...(Risas y aplausos)" (Exposición del Diputado Nacional O'Farrell, Diario de

---

Sesiones, 1909, I, Reunión n.22, 11 de Agosto de 1909, p.633).

<sup>11188</sup> Exposición del Diputado Nacional Enrique Martínez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.74, 20-XI-1919, t.VI, p.354.

<sup>11189</sup> Exposición del Diputado Nacional Enrique Martínez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.74, 20-XI-1919, t.VI, p.354.

<sup>11190</sup> E. Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11191</sup> "...Veinticinco años de dominio de una familia debe cansar a un pueblo y más si ese pueblo es reducido" (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 12a Sesión ordinaria, 16-VI-1904, p.110).

<sup>11192</sup> Hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y marido de Aurora Reboyras (Calvo, IV, 538). Los Lucero eran descendientes del Gobernador Coronel Pablo Lucero, quien gobernara a San Luis en las postrimerías del régimen rosista.

<sup>11193</sup> Sommariva, 1931, II, 309; y Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 183.

<sup>11194</sup> Beazley a Julio A. Roca, San Luis, 28-VI-1904 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>11195</sup> Hijo del Coronel Carlos Juan Rodriguez y de Demófila Jurado, y marido de Josefa Ercilia Ortiz Estrada. Era cuñado de los Gobernadores Adolfo Rodríguez Saa (Cutolo, VI, 322), y de Juan Agustín Ortiz Estrada.

<sup>11196</sup> De ahí el nombre de "motineros" con que se los conoce en San Luis.

<sup>11197</sup> Producido el motín, confesaron al Ministerio del Interior el móvil profundo de su sensualismo político: "...tenemos que responder a la necesidad de nuestros amigos políticos. Necesitamos puestos" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 30-IX-1928, p. 871).

<sup>11198</sup> Melo, 1964, 109.

<sup>11199</sup> hijo de Robustiano Patrón Escobar y de Francisca Costas Figueroa (Calvo, VI, 191), y cuñado del jurista José María Solá, quien había sido en un matrimonio anterior yerno del célebre político liberal salteño Isidoro López.

<sup>11200</sup> marido de Prelidiana Torino y López (Jáuregui Rueda, 1976, 134).

<sup>11201</sup> Hijo de Florentín Linares Toledo Pimentel y de Dolores Usandivaras y Ovejero, y nieto materno de Manuel Usandivaras y Díaz de la Fuente y de Florentina Ovejero Zerda. Su abuelo Manuel Usandivaras había contraído un segundo matrimonio con Servanda Zerda y Medina, hermana mayor del que fuera Gobernador de Salta Don Angel Zerda y Medina; y su abuela Florentina era hermana y tía carnal de los que fueron fundadores y dueños del Ingenio Ledesma y Gobernadores de Salta y Jujuy Sixto Ovejero Zerda, David Ovcjero Gonsález, y Daniel Ovejero y Tezanos Pintos (Jáuregui Rueda,

---

1976, 132 a 134).

<sup>11202</sup> Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola Otero (Cornejo, 1983, 270). Hermano de los Diputados Nacionales Ignacio Ortiz Viola (DN.1886-90) y Abel Ortiz Viola (DN.1882-86), primo hermano del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Alemán (SN. 1880-89); cuñado del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04) y tío carnal del Juez Federal Martín Gómez Rincón (JF.1920/30-31) y del Diputado Nacional Abel Gómez Rincón (DN.1934-46).

<sup>11203</sup> Cornejo, 1983, 144.

<sup>11204</sup> El Cívico (Salta), órgano del partido radical de Salta, 2-X-1906, No. 4.225, cuya copia se halla en AGN, Intervención Federal, Leg.57.

<sup>11205</sup> Ibid.

<sup>11206</sup> Ibid.

<sup>11207</sup> Ibid.

<sup>11208</sup> Adolfo Valdés, David Michel Torino, Juan Patrón Costas, Juan B. Lacroix, Ricardo A. Torino, Andrés de Ugarriza, M. Torino Pintos, y Ramón B. Castro.

<sup>11209</sup> AGN, Intervención Federal, Leg.56.

<sup>11210</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.

<sup>11211</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.

<sup>11212</sup> probablemente hijo de Francisco J. Alsina.

<sup>11213</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107.

<sup>11214</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 20-IX-1912, p. 845.

<sup>11215</sup> Ibid.

<sup>11216</sup> Ibid.

<sup>11217</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.63, 29-I-1913, p.423.

<sup>11218</sup> Ibidem.

<sup>11219</sup> Ibidem.

<sup>11220</sup> Ibidem.

- 
- <sup>11221</sup> Jáuregui Rueda, 1976, 134.
- <sup>11222</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1913, p.423.
- <sup>11223</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Continuación de la 4a. Sesión Extraordinaria, 10-XI-1906, Reunión No.53, 983-993; y Serrey, 1945, III, 327.
- <sup>11224</sup> Ibid.
- <sup>11225</sup> Ibid.
- <sup>11226</sup> según Oyhanarte, el origen del rencor de Paz hacia su primo obedecía a que este último le había engañado ofreciéndole en su primera gestión la futura Presidencia de la República, pero cuando llegó el momento se la ofreció a su conuñado, y para él solo la Intendencia de Buenos Aires (Oyhanarte, 1932, 1988, 54).
- <sup>11227</sup> Díaz de Molina, 1979, 88.
- <sup>11228</sup> Hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y hermano de los ex-Gobernadores de San Luis Toribio y Eriberto Mendoza (Díaz de Molina, 1979, 29; y Cutolo, IV, 538).
- <sup>11229</sup> Díaz de Molina, 1979, 88.
- <sup>11230</sup> Laband y Lentz, 1985, 401.
- <sup>11231</sup> primo del Gobernador Enrique Carbó Ortiz (GP.1903-07); y del Diputado Nacional Alejandro Carbó Ortiz (DN.1898-1916).
- <sup>11232</sup> Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).
- <sup>11233</sup> Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).
- <sup>11234</sup> Ibidem.
- <sup>11235</sup> Ibidem.
- <sup>11236</sup> Ibidem.
- <sup>11237</sup> Antes de ser Gobernador completó el período senatorial de Antonio Crespo, que había fallecido en 1893. Y luego de haber sido Gobernador ocupó la vacante senatorial que dejó Leónidas Echagüe en 1899 prolongando su mandato hasta 1907, siendo este último año elegido por un período de nueve (9) años hasta 1916 (Melo, 1964, 104-105, nota 5). Para el periódico El Diario, en un artículo titulado "La senaturía de Maciá", "...en este cambalacheo característico en el PAN y de posición de exclusivo provecho personal, el gobernador Maciá no ha hecho sino repetir la operación de todos los gobernadores pasando

---

del caño al coro y de la mula al macho" (El Diario, miércoles 4-I-1899).

<sup>11238</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11239</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11240</sup> como Mabragaña, Cetz, La Cruz, Teófilo García, Alberti, Monzón, Martín Meyer, Funes, Facio, López, Miranda.

<sup>11241</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11242</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11243</sup> por el Diputado Nacional Francisco Solano Gijena.

<sup>11244</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11245</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11246</sup> hijo del Gral. Pascual Echagüe Garmendia, santafesino, y de María Puig Troncoso; y sobrino político del célebre caudillo y Gobernador Ricardo López Jordán (h).

<sup>11247</sup> sobrino del que fuera Gobernador de Santa Fé Juan Pablo López (a) "Mascarilla", hermanastro del Brigadier Estanislao López.

<sup>11248</sup> Sommariva, 1931, II, 301.

<sup>11249</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1900, Reunión No.14, p.153.

<sup>11250</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1900, Reunión No.14, p.153.

<sup>11251</sup> Idem, p.154.

<sup>11252</sup> Ibidem.

<sup>11253</sup> Idem, p.155.

<sup>11254</sup> Ibidem.

<sup>11255</sup> Ibidem.

<sup>11256</sup> Ibidem.

---

<sup>11257</sup> Ibidem, p.188.

<sup>11258</sup> Ibidem.

<sup>11259</sup> Ibidem.

<sup>11260</sup> Era sobrino de Francisco Carbó Rams, quien era concuñado de Pascual Echagüe y de Ricardo López Jordán. El Diputado Alejandro Carbó es el mismo Diputado Nacional que luego polemizó con Osvaldo Magnasco y que integró la fórmula presidencial conjuntamente con Lisandro de la Torre (Columba, 1978, I, 55-62).

<sup>11261</sup> Carbó completó el período Senatorial de Salvador Maciá entre 1895 y 1898. Y es reelegido para el período senatorial 1898-1907, pero designado Gobernador de Entre Ríos deja su lugar al Gobernador saliente Leónidas Echagüe. Al terminar su período de Gobernador, Carbó es elegido Senador por nueve años, cargo que abandona en 1914 para desempeñar el Ministerio de Hacienda de la Nación (Melo, 1964, 105, nota 5).

<sup>11262</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1900, p.222.

<sup>11263</sup> Ibidem.

<sup>11264</sup> Laband y Lentz, 1985, 401.

<sup>11265</sup> probablemente hijo o sobrino del General Oriental Francisco Caraballo, que participara de la rebelión Jordanista de 1873.

<sup>11266</sup> J. F. Antelo a J. Roca, Uruguay, 9-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>11267</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>11268</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>11269</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Concepción del Uruguay, 6-II-1881 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

<sup>11270</sup> Caraballo dirigía en 1883 El Constitucional de Paraná (Rato de Sambuccetti, 1995, 225, nota 71). El Dr. Caraballo, apadrinado por el Dr. Navarro y el Dr. Estéban María Moreno, se batió en duelo a muerte, con sable corvo, con el Diputado Cigorraga, apadrinado por el Dr. León Czetzy y por Pita, en la quinta del Dr. Sagastume. Cigorraga "...al irse a fondo, tropezó contra una piedra y midió el suelo con todo el largo de su cuerpo. Caraballo creyó que había muerto a su adversario, y llegando a grandes trancos hasta el fálucho que estaba amarrado en la costa, se embarcó y atravesando el río, bajó en Paysandú, donde los revolucionarios creyéndolo revolucionario Oriental, lo aprehendieron, enviándolo preso a Colonia, según se asegura, a pesar de haber invocado sus inmunidades de diputado" (El Nacional, 14 y 15-V-1883, nos.11.020 y 11.021).

<sup>11271</sup> Las Provincias, 4-II-1883, n.619.

---

<sup>11272</sup> Hijo de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno, casó cuatro veces, la primera con Clara Cabot, la segunda con Sofía Maurer, la tercera con Ana Sieber, y la cuarta con Dominga Cullen Iturraspe, viuda de Emilio Cabal y González (Calvo, II, 36). En 1897 había circulado el rumor de que "...el Colegio Electoral alegaría contra Iturraspe, de que este ha perdido la ciudadanía argentina por haber aceptado antes un Consulado extranjero sin permiso del Senado, no habiendo mediado después su rehabilitación" (Desiderio Rosas a J. Roca, Rosario, 21-XII-1897, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76). La candidatura de Iturraspe vino a terciar entre las facciones Galvista y Leivista y fue impuesta por Roca.

<sup>11273</sup> Nacido en 1862, hijo de Benito Freyre Rodríguez del Fresno, y de Manuela Iturraspe Freyre; nieto paterno de José Freyre de Andrade y de Manuela Rodríguez del Fresno; y nieto materno de José Buenaventura de Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno (Cutolo, I, 265; y III, 147; y Calvo, I, 265). Era cuñado del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y primo político del Diputado Nacional Octavio Grandoli Correa.

<sup>11274</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Período de 1901, 13a Sesión de Prórroga, 16-XI-1901, p.456.

<sup>11275</sup> *Ibidem*.

<sup>11276</sup> Iturraspe afirmaba "...que ni un sólo día, desde que Freyre asumió el mando, le ha estorbado en su acción administrativa y política, y la verdad es que Freyre no concreta un sólo cargo en contra de tal afirmación. Sin embargo, sus prevenciones y hostilidades contra Iturraspe y sus amigos, es ya manifiesta" (Nicasio Oroño a J. Roca, Joaquina, 1-III-1904, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.103).

<sup>11277</sup> Nacido en 1875, hijo de Tomás Galigniana y de Agustina Segura, y marido de Isabel López (Cutolo, III, 187). Era sobrino-nieto carnal del Gobernador Juan de Dios Corvalán.

<sup>11278</sup> Nacido en 1801, hijo de Diego Arroyo y de Paulina Juárez, y marido de Trinidad Godoy, hija de Francisco de Borja Godoy y de Antonia Sáez (Cutolo, I, 245).

<sup>11279</sup> Nacido en 1840, hijo de Melchor Villanueva y de Dolores Delgado, y marido de Edelmira Galigniana (Funes, 1951, 85; y Cutolo, VII, 645; y Villanueva Ara, 1996, 55-94). Era primo hermano del Gobernador Nicolás Villanueva García (GP.1867).

<sup>11280</sup> Olguín, 1961, 113; y Melo, 1964, 105, nota 5.

<sup>11281</sup> Funes, 1951, 133; y Martín, 1981, 48.

<sup>11282</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.43, 23-IX-1924, p.473.

<sup>11283</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.43, 23-IX-1924, p.473.

<sup>11284</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.43, 23-

---

IX-1924, p.473.

<sup>11285</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.43, 23-IX-1924, p.473.

<sup>11286</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.18, 26-VII-1928, p.655.

<sup>11287</sup> *Ibidem*.

<sup>11288</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>11289</sup> Para el caso argentino, Bosch (1964) se refiere al Poder Judicial en la Confederación Argentina (1854-1861) y al debate sobre el nacimiento del fuero federal; Ibáñez Frocham (1938), Díaz (1959) y Allende (1973) incursionaron sobre la Justicia durante la tiranía de Rosas; y Comadrán Ruiz (1988) se refiere a la justicia penal. Otros autores como Cornejo (1983) y Martínez Peroni (1983) prefirieron incursionar en el género puramente biográfico e ideológico.

<sup>11290</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento (Carmagnani, 1988, 12).

<sup>11291</sup> El poder inhibitorio o avocatorio del Ejecutivo y del Legislativo, como herencia del Antiguo Régimen colonial, aún se hallaban subsistentes. Avocar consistía en asumir las causas pendientes o, en otras palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior. En la Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030). Estas instituciones se perpetuaron con ciertos velos o disimulos en la primera mitad del siglo XIX, como por ejemplo en el Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria, duramente criticado por Agustín Francisco Wright en 1838, en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8-III-1838, 20-27; t.23, n.588, 9-III-1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36), así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga (Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971, 164-205). Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21).

<sup>11292</sup> Linares Quintana, 1942, I, 17 y 95.

<sup>11293</sup> para el caso Inglés, ver Prest (1991); para el del Perú, ver Mac Lean Estenos (1945); para el de Colombia, ver Martínez Sarmiento (1943) y Vélez B., Gómez de León, y Jaime Giraldo (1987); para el del Paraguay, ver Ocampo (1945); para el de Bolivia, ver Paredes (1944); y para el del Brasil, ver Pang and Seckinger (1972); Flory (1975, 1977); y Barman y Barman (1976, 1977).

<sup>11294</sup> González Calderón, 1923, II, 470 o 1931, II, 988; citado en Linares Quintana, 1942, II, 22, nota 234. Acerca de la influencia del Poder administrador sobre el Legislativo en Bentham, ver Crimmins, 1994, 265-267.

<sup>11295</sup> representada por May (1884), Bañados Espinosa (1888), Todd (1902), Micell (1902), Montes de Oca (1910), Roldán (1917), Bas (1927), Barthélemy (1939) y González Calderón (1923, 1931).

<sup>11296</sup> Linares Quintana, 1942, II, 563. Lamentablemente para la noción de división de poderes no he podido consultar a Agapito Serrano (1989), por hallarse agotado.

---

<sup>11297</sup> ver Saguier, 1995 y 1996-1997. Para la contribución de Vélez Sárfield al derecho de la Argentina independiente, ver Rosti, 2003.

<sup>11298</sup> Zimmermann, 1994, 5.

<sup>11299</sup> tales como Bañados Espinosa (1888), Micell (1902), González Calderón (1909, 1931), Montes de Oca (1910), Roldán (1917), Bas (1927) y Barthélemy (1939) (Linares Quintana, 1942, II, 563).

<sup>11300</sup> González Calderón, 1917, II, 75; o 1923, II, 470; citado en Linares Quintana, 1942, II, 22, nota 234.

<sup>11301</sup> Bosch, 1965, 21.

<sup>11302</sup> sobrino del General Aniceto Latorre.

<sup>11303</sup> Francisco J. Ortiz a J. Roca, Salta, 25-I-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21).

<sup>11304</sup> M. Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 10-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.384).

<sup>11305</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 122.

<sup>11306</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>11307</sup> Ibidem.

<sup>11308</sup> Ibidem.

<sup>11309</sup> Ibidem.

<sup>11310</sup> Silvano Bores a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>11311</sup> publicado en El Independiente, de Tucumán, del 7-III-1879.

<sup>11312</sup> José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7.

<sup>11313</sup> Posteriormente, a comienzos del siglo XX, se incluyó la justicia letrada, ver para ello el debate parlamentario sobre la Justicia de Paz entre los Diputados Nacionales Manuel Carlés y Juan Balestra a favor de la justicia lega, contra los Diputados Gouchon e Iturbe a favor de la justicia letrada, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1905, I, 8a. sesión ordinaria, 19a. Reunión, del 19-VI-1905 al 30-VI-1905, pp.649-746.

<sup>11314</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

<sup>11315</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

<sup>11316</sup> José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

<sup>11317</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 18-VIII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, IEG.15.

<sup>11318</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>11319</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>11320</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

---

<sup>11321</sup> Ibidem.

<sup>11322</sup> Ibidem.

<sup>11323</sup> Ibidem.

<sup>11324</sup> José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

<sup>11325</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9.

<sup>11326</sup> Antonino Taboada a Próspero García, Catamarca, 23-VI-1867 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11327</sup> Pbro. José F. Segura a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>11328</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 7-III-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). A propósito de este despropósito, Absalón Rojas manifestaba que "...el extravío y la pasión llevó a nuestros mismos amigos hasta hacer alianza con los Mitristas para cometer en la Legislatura la más grande de las iniquidades cuyo único resultado positivo fué dar a los contrarios una mayoría en ella, mayoría que no la hubieran obtenido por otro camino y que hoy sirve de rémora, por lo menos, a la marcha normal de este gobierno" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

<sup>11329</sup> José Posse a J. Roca, Tucumán, 7-III-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

<sup>11330</sup> entre los cuales estaban los Delfinistas (por Delfín Leguizamón) y Güemistas: Tomás Oliver, Carlos Grande, Francisco J. Alsina, el Dr. García, y el Dr. Angel M. Ovejero.

<sup>11331</sup> heredado del aforismo Romano que reza Nemo esse iudex in sua causa potest (Nadie puede ser Juez en causa propia).

<sup>11332</sup> Eliseo Outes a Julio A. Roca, Salta, 16-VIII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.73).

<sup>11333</sup> sobre la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires entre 1830 y 1852, ver Garavaglia, 1997.

<sup>11334</sup> Halperín Donghi, 1985, 87.

<sup>11335</sup> Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109.

<sup>11336</sup> Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109.

<sup>11337</sup> José Uriburu a Anselmo Rojo, Salta, 27-I-1856 (AGN, Sala VII, Colección Rojo, 10-3-2).

<sup>11338</sup> Ibidem.

<sup>11339</sup> "...está en manos de los Jueces de Paz de toda la República, la pureza del sufragio, porque son los Presidentes de las Juntas que hacen la inscripción de los ciudadanos, es decir, la calificación de los votantes, y bastaría que un Juez de Paz, pusiera entorpecimiento a un reclamo, para que un voto falso quedase en la inscripción, o para que un voto válido no fuese recibido en ella. Son, además de los funcionarios que dirigen la inscripción, los Presidentes de los Tribunales de Apelación por inscripción indebida....Son ellos los que deben entregar las urnas y los registros" (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1882, I, 123).

<sup>11340</sup> que a la sazón lo desempeñaba el Dr. Martín Herrera, de filiación Nacionalista.

<sup>11341</sup> Francisco Olivera a J. A. Roca, Santiago del Estero, 1-III-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22.

<sup>11342</sup> José S. Daza a Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

- 
- <sup>11343</sup> José S. Daza a Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).
- <sup>11344</sup> J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).
- <sup>11345</sup> Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).
- <sup>11346</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11347</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11348</sup> Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).
- <sup>11349</sup> nacido en La Rioja (no confundir con el homónimo porteño), hijo del Mayor Juan de la Cruz Torres y de Dominga Moreno, y marido de Delicia de la Fuente (Cutolo, VII, 375).
- <sup>11350</sup> San Román le expresaba a Luis María Campos que "...estamos en plena dictadura. El Poder Judicial acaba de ser derrocado para hacer mayoría en la Junta Escrutadora, por supuesto con un verdadero atentado constitucional. Quedamos sin tribunales y entregados a la justicia de un animal, como Lorenzo Torres, Camarista!!! y de un borracho consuetudinario un doctorcito Pazos!!!" (Guillermo San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).
- <sup>11351</sup> "...Esos jueces nos están costando muy mucho, no solo por el esfuerzo que tenemos que hacer para contrarrestarlos en sus pillerías sino por la burla que de ellos se recibe. Hombres de puntos medios, de luz y sombra, hermafroditas políticos todo lo quieren, pero sin responsabilidad" (Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 26-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).
- <sup>11352</sup> L. Olmos a Dardo Rocha, Catamarca, 11-XII-1885 (AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.215).
- <sup>11353</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).
- <sup>11354</sup> Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).
- <sup>11355</sup> Segundo Benavidez a J. Roca, San Juan, 22-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.
- <sup>11356</sup> Esta realidad se extendió a lo largo del continente hispanoamericano, por cuanto se observó en México, tal como lo refieren Schmitt (1962) y Coerver (1990); y en la República Dominicana, como lo señala Martínez-Fernández (1995).
- <sup>11357</sup> ver Bruno, X, 513-530.
- <sup>11358</sup> Bosch, 1965, 13.
- <sup>11359</sup> Bischoff, 1971, 50-51; y Grenón, 1968, 311-313; citados en Cutolo, II, 286.
- <sup>11360</sup> Ortega, 1963, 257.
- <sup>11361</sup> Jurista experto en minería, autor de El Código de Minería para la Confederación Argentina (Buenos Aires, 1886). Sobrino del que fuera Gobernador de San Luis Justo Daract,
- <sup>11362</sup> M.R. Sáez a Julio A. Roca, Mendoza, 12-IX-1875 (AGN, Archivo Julio A. Roca, Leg.2, Documento 458, fs.363-367)
- <sup>11363</sup> *Ibidem*.
- <sup>11364</sup> Joaquín Villanueva a J. Roca, Mendoza, 13-III-1877, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4.

---

<sup>11365</sup> Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11366</sup> Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11367</sup> Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11368</sup> seguidores del Gobernador José Benito de la Bárcena.

<sup>11369</sup> J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Montescos y Capuletos era la comedia de Don Francisco de Rojas Zorrilla, más conocida con el título de Los bandos de Verona, cuyo argumento está basado en los amores de Romeo y Julieta y en la enemistad de la familia Montesco, perteneciente al bando güelfo, partidario del Papado, triunfante en Florencia y Pisa, al que se hallaba afiliado Romeo, con la familia de los Capuleti, perteneciente al bando gibelino, partidario del Emperador, triunfante en Verona y Milán, al que estaba ligado Julieta (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.36, 603).

<sup>11370</sup> Ibidem.

<sup>11371</sup> cuñado del Diputado Nacional Justino Solari.

<sup>11372</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>11373</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>11374</sup> Guillermo Sarmiento a J. Roca, San Juan, 16-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>11375</sup> Sánchez Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, Archivo Juárez Celman, Leg.15.

<sup>11376</sup> Sánchez Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, Archivo Juárez Celman, Leg.15.

<sup>11377</sup> Barraquero, 1878, 320, citado por Martínez Peroni, 1983, 478.

<sup>11378</sup> Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga (1824-25), t.III, n.43, p.53.

<sup>11379</sup> ver Cunietti-Ferrando, 1989; Bragoni, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata este crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.

<sup>11380</sup> Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>11381</sup> Cunietti-Ferrando, 1989, 35.

<sup>11382</sup> José Miguel Segura a J. Roca, Mendoza, 30-I-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21.

<sup>11383</sup> Isaac Chavarría a J. Roca, Buenos Aires, 23-XI-1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

<sup>11384</sup> Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215.

<sup>11385</sup> "Dos Vocales de la Corte y uno (o los dos) Juzgados de Primera Instancia ofrecidos por los Caballeros de la situación a los Rochistas (según Zavallía) es algo que no estaba previsto y que da la medida de los aprietos en que se hallan sin tener como formar Administración de Justicia, sintiendo por otra parte además el peso de la opinión del país sobre los que manejan el Gobierno de Santiago" (Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215).

---

<sup>11386</sup> cuya extensa propiedad, denominada Cupalén, parte del Potrero de San Lorenzo, heredado de los García de Zúñiga, le disputa el Gobierno sin verdadero interés para la Provincia.

<sup>11387</sup> Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de El Uruguay y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandó, 1965, II, 380, 532; III, 257 y 328).

<sup>11388</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 1882, AGN, Sala VII, arch. Roca, Leg.28.

<sup>11389</sup> M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11390</sup> Emilio Villafañe a V. de la Plaza, Paraná, 9-IX-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392).

<sup>11391</sup> Escalera y Zuviría a J. Celman, Rosario, 16-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

<sup>11392</sup> ver Dagrossa (1990-91).

<sup>11393</sup> Halperín Donhi, 1985, 190. Para un estudio de la emergencia de una magistratura electa en Estados Unidos, ver Hall (1983).

<sup>11394</sup> L. B. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 8-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

<sup>11395</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 12-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

<sup>11396</sup> marido de María Luisa Padilla Nougues, hermana mayor del Gobernador Ernesto Padilla, y sobrina carnal de los Rochistas Tiburcio y Angel Cruz Padilla Puente y de los Juaristas José e Isaías Padilla.

<sup>11397</sup> Lucas Córdoba a J. A. Roca, Tucumán, 22-VI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.72.

<sup>11398</sup> propiedad de un tal Nicanor Garramuño.

<sup>11399</sup> por insultar en un escrito, donde tenía entablado juicio contra El Zonda, "...a la situación, al Juez [Sánchez] Benavidez y al redactor de El Zonda, con quien tiene añejo pleito de injurias" (Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32).

<sup>11400</sup> Novoa había aceptado la Presidencia de la Cámara de Justicia de Córdoba.

<sup>11401</sup> El 27 de Enero Absalón Rojas le escribe a Roca informándolo que "...Larsen y otros han sido reducidos a prisión. Esta es una de tantas sonceras que se cometen en mi tierra y quizá de las peores que haya habido motivo que justifique la prisión de Larsen, cuanto porque es enconar mas los ánimos y alarmar la opinión fuera de Santiago, con estas medidas tan estremas. Pero yo no estraño esto, porque hay cerca de Gallo algunos que son salvajes en sus odios. Yo no pretendo tampoco santificar a Larsen, pues lo conozco y sé que tiene un carácter impetuoso, que quiere y odia con vehemencia y le falta la calma y reposo necesarios para soportar las contrariedades de la vida. Creo que Larsen me escuchaba y puedo asegurar que su prisión, que tiene por fundamento un supuesto plan de revolución [Rochista], es injusta, pues que si algún pensamiento loco existió en algún momento de despecho o de exaltación, ese pensamiento no hubiera madurado por cuanto, como le decía a Vd. en mi anterior, no encontrarían apoyo en los elementos del partido, en virtud de haberlos yo vinculado ya al Gobierno, o mejor dicho a Telasco [Castellanos] personalmente" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 27-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). El propio Larsen le escribía a Rocha contándole que "...hasta hoy que van 17 días no se me ha dicho la causa de mi prisión ni se ha dictado auto de prisión, me detiene por simple orden superior y para soltarme andan buscando de que manera pueden hacerlo sin declarar que no hay mérito para proceder contra mí. Estos últimos tiempos me ocupaba en estudios históricos, no salía de casa, ni hablaba con nadie; de esta actitud sacaron que algo tramaba y como son muy miedosos, los candidatos influyeron ayudándoles la mujer del Gobernador para que me aprisionaran. Quizá pronto esté en libertad sin instruirse la causa, para la cual no hay mérito, pero aunque esto suceda, no se me escapa que Goyena y Avellaneda han de poner dificultades a mi nombramiento para el Juzgado Federal" (Gabriel Larsen del Castaño a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Sin embargo, Jaime Vieyra sostenía que "...se ha tenido con él toda clase de consideraciones y no se lo ha metido preso sino cuando se han tenido las pruebas evidentes de la revolución, y para que Vd. crea

---

más en ella le diré que Roca desde Córdoba fué el primero que la denunció pues a él fueron a proponérsela pidiéndole su apoyo y cuando él no les aceptó fueron a esa a ponerse de acuerdo con ilusos que nunca faltan" (Jaime Vieyra a D. Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

<sup>11402</sup> Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

<sup>11403</sup> Bazán, 1967, 652.

<sup>11404</sup> casado con una hija del clan de los Carrillo, de filiación Barcenista (Uriburista).

<sup>11405</sup> Francisco J. Ortiz a J. Roca, Salta, 25-XII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28; Teodosio Temístocles Carrizo a Victorino de la Plaza, Jujuy, 17-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-6, fs.319; y Teodoro Sánchez de Bustamante a J. Roca, Jujuy, 18-V-1883 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>11406</sup> Zimmermann, 1994, 7.

<sup>11407</sup> Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11408</sup> Nicasio Oroño c/su cuñado Camilo Aldao, s/liquidación de sociedad de capital e industria para contratar la proveeduría del Ejército del Gobierno de la Confederación, Fallos de la Corte Suprema, Causa LXXV, t.VIII, 1875, p.450-452; Nicasio Oroño c/ José Ramón Aldao p/rendición de cuentas, Causa CL, t.IX, 1877, p.301-303; Causa XLVIII, 1885, t.XIX, p.182-183; Causa CXVII, 1888, v.34, 223-226; Dr. Manuel M. Zavalla c/ Domingo Cullen, s/tierras en el paraje de Ascochinga, Causa XIX, 1889, v.33, 58-61; José Iturraspe c/su sobrino José Freire, s/justificación y cobro al Gobierno Nacional del valor de los perjuicios causados en sus bienes de campo, Causa LVIII, t.I, 1871, p.311-316; y José Iturraspe, Cónsul Oriental y Vice-Cónsul de Portugal en Santa Fé c/ Petrona Candiotti de Iriondo, Causa CXXIII, t. X, 1877, p.383-386. Ver también Bonaudo y Sonzogni, 1992, 89.

<sup>11409</sup> por contar entre sus cinco miembros al Dr. Zenón Martínez y Cabanillas y al Dr. Blanco, el uno cuñado y el otro socio del ex-Gobernador y entonces Senador Nacional José Gálvez (Carlos Cejas a J. Roca, Santa Fé, 9-IX-1891, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76).

<sup>11410</sup> el mismo que había servido en San Luis.

<sup>11411</sup> ex-Juez Federal.

<sup>11412</sup> Pedro Nolasco Arias a J. A. Roca, Rosario, 7-VI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.72. Arias aludía interesadamente a este parentesco porque sabía que Julio A. Roca era sobrino carnal de Genoveva Paz Mariño, mujer de Pío Figueroa Aráoz y por tanto primo hermano de los Figueroa Paz.

<sup>11413</sup> Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>11414</sup> C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

<sup>11415</sup> Hijo del Gobernador José Pío Cisneros y de Anastasia Sánchez de Loria.

<sup>11416</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 2a. Sesión de Prórroga, p.100.

<sup>11417</sup> A. Belín Sarmiento a Dardo Rocha, San Juan, 12-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.

<sup>11418</sup> en un juicio promovido por Delfín Leguizamón contra un amigo de Ortiz por supuestas violaciones de la libertad de sufragio en la elección de Diputados Nacionales del 24 de Febrero de 1878.

<sup>11419</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 2-X-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.687).

<sup>11420</sup> Juan Solá a Victorino de la Plaza, Salta, 30-VI-1878 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala

---

VII, 4-7-14, fs.575).

<sup>11421</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 12-V-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.477).

<sup>11422</sup> *Ibidem*.

<sup>11423</sup> En Entre Ríos, el Juez Federal Mariano Tezanos Pintos era hermano del Diputado Nacional Manuel Tezanos Pintos. En Santa Fé, los Jueces Federales Fenelón y José María Zuviría eran hermanos carnales. Y el Juez Federal Gualberto Escalera era sobrino carnal de los Jueces Zuviría. En Tucumán, el Gobernador Benjamín Aráoz Ormaechea era hermano del Juez Federal Luis Felipe Aráoz. Y el Juez Federal Federico Helguera Molina era hijo del Gobernador Federico Helguera Garmendia y primo hermano del Gobernador y Diputado Nacional Pedro Alurralde. Y el Juez Federal Francisco L. García era pariente del Diputado Nacional Silvano Bores. En Salta, los Jueces, Fiscales y Convencionales Carlos, Flavio, Vicente y Julio Arias Romero eran hermanos carnales. El Fiscal Pedro José Uriburu era sobrino carnal del Juez Federal José Evaristo Uriburu. El Ministro de la Corte Vicente Tamayo Ovejero era hijo del Diputado Nacional Sidney Tamayo Gurruchaga. Y en este siglo, el Juez Federal Martín Gómez Rincón era sobrino carnal del Senador Nacional Francisco J. Ortíz Viola. En La Rioja, el Juez Federal Carlos Luna Herrera era hermano del Diputado Nacional Félix Luna. En Córdoba, el Juez Federal Nicolás Berrotarán era sobrino carnal de los Diputados y Gobernadores Félix y Eleázar Garzón. En San Luis, el Juez Federal Valentín Luco Laborde era hijo del que fuera Ministro de Gobierno de Rafael Cortés, Valentín Luco. Y en Corrientes, el Juez del Crimen (1884) Juan José Lubary Llano era sobrino del Gobernador Manuel Derqui.

<sup>11424</sup> En algunos pocos casos, como en el de los Jueces José Evaristo Uriburu y Delfín Leguizamón, se desposaron con parientas próximas, primas hermanas o primas segundas. En Salta, los Ministros de la Corte de Justicia Miguel F. Costas Fleming y Carlos Zambrano Orihuela eran cuñados. En San Juan, el Juez Federal Nataniel Morcillo era suegro del Gobernador Carlos Doncel Villanueva. En Salta, el Camarista Isidoro López Plaza era cuñado del Ministro Eduardo Wilde García, y suegro del Camarista José María Solá. En Jujuy, el Juez Federal Macedonio Graz era con cuñado del Gobernador José María Álvarez Prado. En Santiago del Estero, el Juez Federal Benjamín Palacio Santillán era cuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra. Y en Tucumán, los Jueces Federales Federico Helguera Molina y Ernesto Padilla Nougues también eran cuñados. Y el Juez Federal Agustín Justo de la Vega Granillo era cuñado de los Gobernadores Marco Manuel Avellaneda y Juan Manuel Terán Alurralde.

<sup>11425</sup> permítaseme citar a Saguier, 1996.

<sup>11426</sup> ver Burton y Higley, 1987, 296-297 y 305; y Rokkan, 1970. Sobre Rokkan, ver Bartolini, 1993, 220-224; Máiz, 1994, 105-106; y von Byeme, 1995, 161-162.

<sup>11427</sup> Solo aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos de la elegibilidad capitular se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que

---

prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

<sup>11428</sup> fundados en Hardoy (1983).

<sup>11429</sup> Si bien en un principio (1859) el comicio duraba el término de tres días, con el posterior desarrollo de las vías férreas y del telégrafo se logró disminuir sus plazos, y acelerarse la publicación de los padrones, y la insaculación y sorteo del personal de las mesas inscriptoras y receptoras. El art.9 de la Ley 623, de 1877, estableció que la Junta Electoral se constituía cuando se hubieran cumplido los requisitos de un Registro Cívico: "...dos meses de inscripción, un mes de publicación, un mes para conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por vía de apelación" (Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217).

<sup>11430</sup> Sobre la aceleración de los medios de comunicación, ver Ensínck (1977); Davire de Musri (1987); Moncaut (1993); y Pérez (1984).

<sup>11431</sup> cables de prensa, fallos judiciales, manuales educativos, partes militares, debates parlamentarios, textos telegráficos, memorias bancarias, sermones y homilias religiosos, etc.

<sup>11432</sup> rasgos semejantes pueden ser observados en la historia peruana, ver para ello Peloso, 1996.

<sup>11433</sup> en el voto activo y pasivo (constitución de Juntas Electorales y designación de los insaculadores de las Mesas inscriptoras y receptoras de votos).

<sup>11434</sup> privando a la primera de instrumentos de poder temporales (registro de actos civiles y administración de la caridad).

<sup>11435</sup> Bonaudo y Sonzogni, 1992, 101; y Guerra, 1993, 369 y 374.

<sup>11436</sup> Guerra, 1993, 369 y 374.

<sup>11437</sup> Borón, 1972, 215.

<sup>11438</sup> Sábato y Palti, 1990, 417. Para estos dos autores, el carácter estructural del fraude consistía en una guerra espacial y temporalmente recortada (Sábato y Palti, 1995, citado en Lettieri, 1995, 10).

<sup>11439</sup> sobre el sufragio restringido en Bolivia, ver Irurozqui, 1996.

<sup>11440</sup> Andrenacci, 1997, 126. Por cierto, no podía ser de otra manera, desde que el sufragio universal se formuló en el Río de la Plata, por vez primera, en la Ley Electoral de 1821 (ver Ternavasio, 1997). Sobre las jefaturas políticas y su incidencia en el clientelismo rural, ver Pavoni, 2000. Sobre la representación política y el derecho de sufragio en la transición a la democracia en Córdoba (Argentina), 1880-1912, ver Chávez, 2000:

<sup>11441</sup> ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997.

<sup>11442</sup> De Micheli, 1991, citado en Nino, 1992, 548.

<sup>11443</sup> Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633.

<sup>11444</sup> Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633.

<sup>11445</sup> En el período colonial, el fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, según el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde

exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibidem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibidem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibidem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibidem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

<sup>11446</sup> Pavoni, 1995, 115.

<sup>11447</sup> art.37 de la Ley 140, y art. 20 de la Ley 207.

<sup>11448</sup> no confundir con las Juntas de Electores o Colegio Electoral, magníficamente descripta por Botana, 1977, 86.

<sup>11449</sup> Los Jueces de Paz eran en esa época jueces legos y no letrados.

<sup>11450</sup> Halperín Donghi, 1985, 87.

<sup>11451</sup> Según Borón (1972) en la movilización electoral, una de las tres componentes de la movilización política, conjuntamente con la movilización organizacional y la psicosocial e ideológica, es una categoría en cuyo interior se distinguen por lo menos cuatro procesos parciales:

- a) la extensión del sufragio;
- b) la inscripción electoral;
- c) el incremento en la proporción de votantes;
- y d) la votación por los distintos partidos (Borón, 1972, 217).

<sup>11452</sup> Diputado Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.218.

<sup>11453</sup> Nicolás Villanueva al Cnel. Julio Campos, Mendoza, 30-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.207).

<sup>11454</sup> hijo del Gral. Dionisio Puch de la Vega Velarde (GD.1841); y sobrino político del prócer Martín Miguel de Güemes Goyechea.

<sup>11455</sup> José Uriburu a Anselmo Rojo, Salta, 27-I-1856 (AGN, Sala VII, Colección Rojo, 10-3-2).

<sup>11456</sup> Ibidem.

---

<sup>11457</sup> Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11458</sup> Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11459</sup> Félix Cordero a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11460</sup> Diputado Nacional Rufino de Elizalde, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 561.

<sup>11461</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 561.

<sup>11462</sup> Graduado en Chuquisaca durante el exilio de sus padres. Es muy probable que el Gral. Roca conociera a este político salteño en oportunidad que acompañara a su tío materno el Dr. Marcos Paz, cuando fué enviado por Mitre después de Pavón como Interventor a las provincias del norte (Yaben, 1938, V, 149).

<sup>11463</sup> Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11464</sup> Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11465</sup> Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11466</sup> Cutolo atribuye la no asunción del cargo a su muerte, pero la verdad fué que las rencillas internas pudieron más que su ya maltrecha salud.

<sup>11467</sup> Sobre la reforma electoral de 1873, ver Segovia (1995).

<sup>11468</sup> Diputado José Cortés Funes, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.151.

<sup>11469</sup> "...El voto público oral se emite de esta manera: el ciudadano concurre al comicio y el oficial público encargado de tomar los sufragios recibe de viva voz, de los labios del votante, los candidatos por quienes vota. Se firma el asiento, se identifica debidamente la persona del elector, y con la nómina de los nombres de esta manera recogidos, se practica el escrutinio. El voto simplemente escrito, en contraposición del voto público, se hace por boletas escritas, impresas o manuscritas, en las que consta el número del registro de inscripción del votante, el nombre del candidato y el nombre del sufragante, y esta boleta se deposita en la urna: es el sistema argentino. El tercer sistema es el del voto secreto, el que se practica de esta manera: el sufragante se presenta ante el jurado, hace inscribir solamente su nombre y el número de inscripción en el registro que llevan los oficiales públicos, y a la urna no va sino una boleta en la que consta simplemente el nombre del candidato" (Diputado Adolfo Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.134).

<sup>11470</sup> Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.159.

<sup>11471</sup> Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.133.

<sup>11472</sup> Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.133.

<sup>11473</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381.

---

<sup>11474</sup> López, 1971, II, 387, citado en Botana, 1977, 254.

<sup>11475</sup> exposición del Senador Domingo F. Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Reunión Ordinaria, p.203. Las listas, tal como lo describe Ternavasio (1995), "...no estaban constituidas por diferentes nombres, sino por una combinación de candidatos que se cruzaban y repetían" (Ternavasio, 1995, 75).

<sup>11476</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>11477</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>11478</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>11479</sup> Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

<sup>11480</sup> sobre esta ley, ver Cullen-Crisol, 1991.

<sup>11481</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.48.

<sup>11482</sup> por Rufino de Elizalde, el Ministro de Mitre.

<sup>11483</sup> Manuel Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

<sup>11484</sup> Juan Fuentes a Carlos Fauvety, Monteros, 24-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

<sup>11485</sup> hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano Colodrero, III, 396).

<sup>11486</sup> G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11487</sup> Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

<sup>11488</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11489</sup> compuesta por el Presidente de la Legislatura, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. En caso de ausencia del Juez Federal lo reemplazaba el Administrador de Correos. El deber del Juez Federal consistía a juicio del Diputado Nacional Filemón Posse en "...informar si son ciertos los hechos en que las protestas se fundan". Pero era la Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los hechos y de la prueba que sobre esos hechos se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no la provincia tal o cual en condiciones electorales" (Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109).

<sup>11490</sup> Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11491</sup> Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

<sup>11492</sup> nacido en La Rioja (no confundir con el homónimo porteño), hijo del Mayor Juan de la Cruz Torres y de Dominga Moreno, y marido de Delicia de la Fuente (Cutolo, VII, 375).

<sup>11493</sup> San Román le expresaba a Luis María Campos que "...estamos en plena dictadura. El Poder Judicial acaba de ser derrocado para hacer mayoría en la Junta Escrutadora, por supuesto con un verdadero atentado

---

constitucional. Quedamos sin tribunales y entregados a la justicia de un animal, como Lorenzo Torres, Camarista!!! y de un borracho consuetudinario un doctorcito Pazos!!!" (Guillermo San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11494</sup> "...El telegrama de Don Pedro Larrahona que acabo de recibir y le incluyo original, nos dá aviso de que el Dr. D. José A. Argüello y D. Jacinto Rincón, agentes nuestros para dirigir los trabajos en el Dpto. Vinchina, han sido presas y detenidos en Sañogasta, cuando se dirigían a su destino, para evitar elección popular en aquel Dpto. y simular actas oficiales bajo la presión de la fuerza. En los demás Departamentos, según avisos que me llegan de momento a momento, sucede lo mismo, y a esta hora habrán sido constituidos en prisión la mayor parte de nuestros amigos en la campaña, la cual es recorrida en todas direcciones por partidas de soldados armados, de línea, de policía y movilizados, que el Gobierno ha distribuido para evitar la elección y simular otra, como la de D. Rubín Ocampo, que han mandado al Congreso, hecha en el Despacho de Gobierno, estando sus registros con la tinta, los sobres y letra de los Escribientes del Despacho. Casi las dos terceras partes de la fuerza nacional del Comandante Fuentes, reforzada con un piquete de línea que llegó últimamente, incluso el Capitán Grigera y otro oficial mas, han sido lanzados a los Dptos. de los Llanos con el objeto de perseguir sufragantes, asaltándolos en los caminos y poblaciones de aquellos Departamentos. Además de estos oficiales, han marchado con fuerzas Bringas y otros profesores del Colegio Nacional, que andan por esos mundos cometiendo todo género de tropelías contra nuestros amigos, que desgraciadamente se encuentran con las manos atadas para escarmentar a estos bandoleros electorales que hacen espalda en el Gobierno Nacional" (G. San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11495</sup> Félix M. Saravia a Victorino de la Plaza, Salta, 1-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393).

<sup>11496</sup> era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavidez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276).

<sup>11497</sup> Desde Salta, en marzo de 1886, en vista de que el Gobernador Solá mantenía la neutralidad y no consentía que se hiciera nada en favor de la candidatura de Juárez Celman, y ante la inevitabilidad del triunfo de Rocha, Benjamín Mollinedo le escribía a J. Celman que "...nos hemos propuesto evitar que tengan lugar las elecciones de Abril en 8 o 10 Departamentos; pues estando dividida la provincia en 21 secciones electorales, necesitamos evitarlas en aquel número para que no hayan los dos tercios de actas, resultando de este modo la elección nula...con el concurso del Dr. Martín G. Güemes, los Ortiz y alguno de los Figueroa, que son los que están en el secreto, es posible obtengamos el éxito deseado. En pocos días mas, tendrá lugar la insaculación de escrutadores y verificada esta, recién le avisaré a Vd. de una manera definitiva, si los 12 votos de Salta han de ser para Rocha o por el aire" (Benjamín Mollinedo a J. Celman, Salta, 5-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

<sup>11498</sup> Luis del Carril a D. Rocha, Salta, 20-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>11499</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>11500</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>11501</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>11502</sup> "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el jóven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). Si no ha habido la intención de soplarle la dama al candidato José S. Daza, con que fin se preguntaba Marcelino Guiol, "...¿se ha cambiado la lista, faltando vergonzosamente a un compromiso tan serio?" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). Guiol no creía que este procedimiento

"...responda a que tal o cual fracción se hubiera querido llevar la vanagloria de poder decir '...yo he demostrado que gozo de más prestigio que los demás', porque sería una tontería siendo que llegaba al mismo fin, esto respondiendo al candidato pactado [Daza]" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza,

---

Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

Por todos estos motivos, Guiol creía "...que hay gato y que ese gato sacará las uñas en el momento de la elección, y quien sabe si no lo arañan al pobre Daza!" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

<sup>11503</sup> En Diciembre de 1883, Juárez Celman se alegra que Roca "...participe de la antipatía que me inspira la persona de tan inflado mulato" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 20-XII-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

<sup>11504</sup> Onésimo Leguizamón a Julio Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11505</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11506</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11507</sup> Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11508</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11509</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11510</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

<sup>11511</sup> Hijo del Diputado Nacional José del Pino y de una hija de Andrés de Villegas y de Carmen Ortiz de Ocampo y Martínez de Arce.

<sup>11512</sup> "...Esos jueces nos están costando muy mucho, no solo por el esfuerzo que tenemos que hacer para contrarrestarlos en sus pillerías sino por la burla que de ellos se recibe. Hombres de puntos medios, de luz y sombra, hermafroditas políticos todo lo quieren, pero sin responsabilidad" (Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 26-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

<sup>11513</sup> Lisandro Olmos a Dardo Rocha, Catamarca, 11-XII-1885 (AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>11514</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 123.

<sup>11515</sup> Exposición del Diputado Nacional Adolfo Contte, Diario de Sesiones, 1908, I, Reunión n.2, 7 de Mayo de 1908, p.47.

<sup>11516</sup> Para un estudio de la chicana y la intimidación en la competencia electoral de 1869 en Texas, ver Baum (1993).

<sup>11517</sup> Hijo de Simón Posse Tejerina y de Josefa Insúa, casado con Natalia Vásquez; primo hermano de los Gobernadores Juan y Wenceslao Posse Talavera, y de los Diputados Nacionales Emidio Posse Talavera y Filemón Posse Bores; y tío segundo del Diputado Nacional Benjamín Posse Alvarez.

<sup>11518</sup> José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11519</sup> José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11520</sup> José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11521</sup> José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11522</sup> L. Quinteros a Luis del Carril, Tucumán, 12-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11523</sup> "...Esa noche y en la mañana del domingo las agrupaciones de amigos establecidos en distintos puntos,

---

fueron invadidos por la Policía y arreados al Dpto. Central y Comisaría no menos de 400 ciudadanos y en la mañana del domingo, rodeados nuestros Comités por agentes de Policía, eran arrastrados los grupos de nuestros partidarios que pretendían llegar hasta ellos. Así resulta que una masa de 500 a 600 ciudadanos y partidarios han sido sustraídos a nuestra manifestación. Y esto que no cuento las intimidaciones, las presiones parciales, los rumores siniestros esparcidos por la autoridad de actos de fuerza y de matanza, los mil actos de cohesión y fraude ejercidos contra nosotros" (V. López Cabanillas a D. Rocha, Córdoba, 3-VIII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11524</sup> para un estudio acerca del valor del voto, ver Argersinger (1989) y Dawson (1992).

<sup>11525</sup> para Segundo Linares, Alvarez Prado "...se ha educado entre bolivianos y ha adquirido esa falsía y esa falta de respeto social que caracteriza a la raza indígena semicivilizada" (S. Linares a D. Rocha, Jujuy, 19-XI-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). Alvarez Prado era "...un hombre sin instrucción, de inteligencia clara, perspicaz, desconfiado, sumamente reconcentrado, que se puede en él confiar a pesar de tener siempre en cuenta su interés personal, que rara vez olvida sus rencores los que guarda sin manifestarlos sino por hechos, su palabra es suave en la que muy pocas veces se encuentran sus sentimientos expresados, razón por la que engaña a quien no le conoce. Tiene a sus órdenes un partido disciplinado que le reconoce como Jefe supremo y una Legislatura que se prestará a sus caprichos. La talla moral de sus amigos políticos poco se diferencia de los del "Club de la Juventud" [de Salta], siendo menos inmorales porque existen pocos empleos a distribuir y son más ignorantes lo que les hace entrar casi en la categoría de una tribu" (Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 25-VII-1885, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216).

<sup>11526</sup> J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

<sup>11527</sup> Pío Uriburu a Luis M. Campos, 5-IV-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

<sup>11528</sup> Absalón Rojas a Juárez Celman, Santiago del Estero, 26-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>11529</sup> Absalón Rojas a Juárez Celman, Santiago del Estero, 26-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

<sup>11530</sup> José S. Daza a M. Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

<sup>11531</sup> José S. Daza a M. Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

<sup>11532</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 16-V-1898, 2a Sesión ordinaria, p.40.

<sup>11533</sup> nacido en San Luis en 1847, hijo de Juan Francisco Garro y de Isidora Ortiz, marido de Eugenia Soria; y autor de un Bosquejo Histórico de la Universidad de Córdoba (Cutolo, III, 277).

<sup>11534</sup> Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

<sup>11535</sup> Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

<sup>11536</sup> Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

<sup>11537</sup> Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217.

<sup>11538</sup> Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217. Acerca del Registro Cívico en la República Oriental del Uruguay, ver Gómez, 1921, I, 557, 597 y 615; y II, 202.

---

<sup>11539</sup> Diputado Zapata, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 27-V-1878, p.58.

<sup>11540</sup> La Unión Provincial, el partido de Don Lucas Córdoba, no había aceptado arreglar con la Unión Popular, "...en la creencia de que el Interventor [Domingo T.] Pérez, cumpliera su promesa de impedir la venalidad en el acto electoral. Si el Interventor evitaba que los demócratas compraran votos, la victoria no podía ponerse en duda, y este mal cuarto de hora de credulidad en los compromisos del representante federal ha producido la derrota de la Unión Provincial.

Al día siguiente, cuando se instalaron las mesas, pudo desde los primeros momentos verse la enorme mayoría de la Unión Provincial: pero también se vió que los demócratas estaban surtiendo sus filas comprando los votos en la Unión Provincial. Netamente la campaña se hacía en contra de Don Lucas; era a él a quien los demócratas le sacaban sus elementos pagando cada voto a 30 pesos al principio y después a 70. La Unión Popular, mientras tanto, corría de atrás, conservándose con sus filas compactas, pues a su vez tenía dinero para contrarrestar la compra de los demócratas, a parte de que no era allí donde estos ejercían su acción corruptora. A las once la Unión Provincial llevaba mayoría en todas las mesas. Esta mayoría se conservó hasta las 12 y media. A esa hora la compra de votos arreció furiosamente. El Diputado [Pedro G.] Méndez en un automovil recorría todas las mesas y frente de los grupos se detenía y desde su máquina gritaba 'se compra votos al contado: se paga hasta 30 pesos'. El pobrerío de Don Lucas se desgranaba.

Aquella gente que había permanecido durante la larga campaña hambriendo por seguir a su caudillo, pero sin ninguna tentación a la vista, comenzó a irse a montones; grupos de 200 hombres con su jefe a la cabeza se pasaron hacia donde los billetes del Diputado Méndez tocaban la campana de llamada. Comenzada la deserción, así colectiva, aquello fue como la rotura de un chiquero, a la una la mayoría de Don Lucas había retrogrado enormemente y los demócratas se iban solos. La Unión Popular se mantenía. Para ella era cuestión de resistencia en las filas Luquistas; si estos se aguantaban a la tentación del dinero demócrata, podía obtener ventajas.

Pero la avalancha demócrata seguía y seguía, siempre surtiéndose en los clubes provinciales inextinguibles que proveían el mercado abundantemente. A las tres la Unión Provincial sabía que estaba vencida completamente y no hizo ningún esfuerzo ya, abandonando la lucha, mientras la Unión Popular seguía votando con los demócratas. A las 4 la elección se cerró y a la simple vista los demócratas estaban triunfantes; nadie dudaba de que así había ocurrido, y tan era exacto ese concepto, que la Unión Popular, urgida por la angustia de la derrota, propuso a la Unión Provincial que protestaran la elección en todas las mesas.

Pero la razón del triunfo de la Unión Popular está en esto. Los demócratas tenían una boleta octogonal y los provincialistas hicieron la suya de la misma forma en algunos momentos. De ahí resultó que muchos que compraron los demócratas votaron por los Provincialistas, disminuyendo así la suma correspondiente a aquellos, pero sin aumentar como para obtener el triunfo la cifra de la Unión Provincial.

En resumen, la elección fue una carrera en la que hicieron el tren los provincialistas con los demócratas luchando por la delantera, y como en la generalidad de los casos, ganó el que guardó caballo desde el fondo" ("Las Elecciones Tucumanas", El Diario, 17-I-1906).

<sup>11541</sup> ver Otero, 1996.

<sup>11542</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11543</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11544</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11545</sup> Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

<sup>11546</sup> Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, pp.522-523.

<sup>11547</sup> por este sistema cada uno de los distritos electorales se dividió en tantas circunscripciones cuantos diputados tenían derecho a enviar al Congreso (Vera Villalobos, 1994, 77).

<sup>11548</sup> La Ley establecía el sistema de lista incompleta, por el cual la lista más votada se aseguraba 2/3 de las

---

bancas, y el tercio restante correspondía a la lista siguiente en número de votos (Vera Villalobos, 1994, 83).

<sup>11549</sup> Vera Villalobos, 1994, 86.

<sup>11550</sup> Vera Villalobos, 1994, 90.

<sup>11551</sup> sectarismos docentes y eclesiásticos, censura periodística, fraude electoral, corrupción de la justicia, y espionaje postal y telegráfico, ver Burton y Higley, 1987, 296-297 y 305.

<sup>11552</sup> permítaseme citar a Saguier, 1997a y 1997b.

<sup>11553</sup> Bartolini, 1993, 222.

<sup>11554</sup> Bartolini, 1993, 222.

<sup>11555</sup> prácticas semejantes fueron experimentadas por los gremios artesanales de Colombia. Ver para ello a Urrutia, 1976; y Sowell, 1996.

<sup>11556</sup> Sobre el mundo artesanal de dos ciudades del norte argentino. Salta y Jujuy primera mitad del siglo XIX, ver Raspi, 2001.

<sup>11557</sup> su objetivo era costear los estudios universitarios de los hijos de sus miembros (Pavoni, 1993, 175 y 237, nota 635).

<sup>11558</sup> Pavoni, 1993, 27 y 84, nota 165.

<sup>11559</sup> Su Jefe era el Dr. Alejo Carmen Guzmán y sus principales hombres lo formaban: Manuel Lucero, Ministro Agustín San Millán, José Pío Achával, Jerónimo Yofre, Francisco Loza, Jerónimo Cortés, Fernando Félix de Allende, Eduardo Ramírez de Arellano, Marcos Figueroa, José M. López, José Severo de Olmos, Clemente Oliva, José María Díaz Rolón, Calixto Ordóñez, Tristán Achával, Pedro Serrano, Clodomiro Oliva, Ceferino Núñez, Severo Obregón, Aristides Aguirre, Domingo Garay y otros de destacada actuación (Díaz de Molina, 1972, I, 55). La denominación de Rusos obedecía a la terminología copiada de la Guerra de Crimea.

<sup>11560</sup> ver Frías, 1977 y 1978.

<sup>11561</sup> S. Bores a J. Roca, Tucumán, 15-XII-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>11562</sup> Miguel M. Nougues a J. Roca, Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7.

<sup>11563</sup> Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393.

<sup>11564</sup> B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

<sup>11565</sup> B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

<sup>11566</sup> B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

<sup>11567</sup> marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena y cuñado Manuel Padilla Bárcena y del Vicario Pablo Padilla Bárcena, hijos del Diputado Provincial Manuel Padilla y de María Bárcena Mendizábal (Calvo, VI, 35). Era hermano menor del Diputado Nacional Tiburcio Alvarez Prado, con cuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda.

<sup>11568</sup> Segundo Linares a J. Roca, Jujuy, 17-XII-1890, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

---

<sup>11569</sup> Con respecto al rol de las provincias en las cuestiones político-sucesorias, el Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín, opuesto al Senador Nacional Agustín Gómez, sostenía que San Juan no podía por su posición geográfica, "...tan a trasmano", y por su escasa relevancia demográfica (electoral), "...iniciar candidaturas nacionales para Presidente de la República", y su rol político se debería reducir "...a vigorizar candidaturas ya iniciadas en otras Provincias, que cuentan con un fuerte núcleo de opinión en su favor" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). A este hondo complejo de inferioridad, sólo hizo excepción el Senador Rafael Igarzábal quien durante la presidencia de Sarmiento había proclamado infructuosamente en San Juan la candidatura de Manuel Quintana; durante la presidencia de Avellaneda había propuesto al Club del Pueblo, sin éxito alguno, la candidatura del Gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor; y durante la primera presidencia de Roca, en el segundo año de su gobierno, y faltando cuatro años para la finalización de su mandato, propuso la candidatura de Bernardo de Irigoyen. Esta última proclamación resultó, en opinión de Albarracín, "...con tan mala suerte como antes porque a estas alturas, nadie quiere comprometerse, y lo que es peor, con el prejuizo de que él ha de ser el primero que la ha de abandonar como lo hizo con sus anteriores candidaturas" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27).

<sup>11570</sup> Torrent, en una precoz interpretación existencialista, al estilo Carl Schmitt, sostuvo que de las revoluciones "...no me ocupo de ver si son un derecho de los pueblos, desde que son algo más: son un hecho. Un hecho, por cuanto no hay esfuerzo humano que lo contraste. Las verdaderas revoluciones, son inevitables y son invencibles" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.228).

<sup>11571</sup> Senador Juan Eusebio Torrent, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.234.

<sup>11572</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>11573</sup> ver Saguier (1995) y (1997). Sobre la creación del Círculo Militar y el peligro de que se constituya en un centro de conspiraciones políticas, ver la exposición del Diputado Nacional Nicolás Repetto, en Diario de Sesiones, 1919, IV, 584.

<sup>11574</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al márgen del fin utilitario que dió origen a cada documento.

<sup>11575</sup> Nunn (1970, 1972); Ramírez Necochea (1984); García Molina (1990, 1994 y 1995); Brahm García (1990); Maldonado Prieto (1993); y Vergara Quiróz (1993).

<sup>11576</sup> para el caso español, ver Pérez Garzón, 1978; para el del Brasil, ver Nunn (1972) y Morton (1975); y para el de Chile, ver Nunn (1970), Ramírez Necochea (1984), Vergara Quiróz (1989, 1993), Brahm García (1990), Cordero (1992), y Maldonado Prieto (1993).

<sup>11577</sup> Cantón, 1965; citado por Grondona, 1967, 188 y 192.

<sup>11578</sup> Roberts, 1938, 287.

<sup>11579</sup> A diferencia de los ejércitos del Antiguo Régimen colonial, cuya tropa estaba formada por indios o mestizos encomendados, soldados mercenarios, y esclavos de origen africano, y cuya oficialidad estaba constituida por un conjunto de vecinos con posiciones honoríficas, los cuadros de oficiales de los Ejércitos nacionales se supone estaban formados no por vecinos sino por aquellos miembros de la elite que se habían curtido en los numerosos combates librados durante las guerras de Independencia y las guerras civiles.

<sup>11580</sup> ver Eduardo R. Saguier, "La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina".

<sup>11581</sup> Zimmermann, 1994, 5.

<sup>11582</sup> Rouquié, 1981, 76.

---

<sup>11583</sup> Estrada, 1923 [1877], II, 214; y Montes de Oca, 1910, II, 148-54; citados por Linares Quintana, 1942, II, 36-37.

<sup>11584</sup> Ortega, 1963, 191.

<sup>11585</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. El Gobierno Nacional había reprobado la ejecución de Angel Vicente Peñaloza "ordenada después de su captura", pues nada habrá "...debido ni podido ejercer sobre él las atribuciones y prerrogativas de los Tribunales y del Jefe Supremo del Estado", mandando insertar el 26-XI "esta Resolución en la Orden General del Ejército" (Argentina, Ministerio de Guerra y Marina, Memoria, año 1864, Anexo A, pp.48-52; citado en Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, II, 164).

<sup>11586</sup> nacido en Inglaterra, vino cuando niño junto a su padre Santiago Spencer Wilde, siendo ahijado del Duque de Wellington. Peleó en Ituzaingo a las órdenes del Coronel Brandsen; en La Tablada y Oncativo a las órdenes del Gral. Paz; y en la Ciudadela a las órdenes del Gral. Lamadrid. Estuvo en Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí y Yataití Corá. Fué marido de la Tucumana Visitación García, hermana de Fortunata García, aquella que sacó de la pica la cabeza del Mártir de Metán; y medio hermano del escritor José Antonio Wilde (Cutolo, VII, 727).

<sup>11587</sup> hijo de Tadeo Rojo y Maurín y de Gertrudis Frías y Mallea (Cutolo, VI, 349). Su mujer Dámasa de Alvarado Poveda, hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda Isasmendi, era prima del que luego fuera el Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", sobrina del Gral. Rudecindo Alvarado y pariente de José María Todd (h) (Fernández Lalanne, 1989, 77).

<sup>11588</sup> W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11589</sup> W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

<sup>11590</sup> hijo del Coronel W. Wilde.

<sup>11591</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>11592</sup> El Liberal (Tucumán), 29-V-1864, n.245.

<sup>11593</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>11594</sup> Anselmo Rojo a Wenceslao Paunero, Tucumán, 5-IV-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2629).

<sup>11595</sup> "...a instigación de su yerno Isidoro López hace sublevar al 8o., olvidando ese miserable que debía el honor de mandar esa fuerza, al mismo a quien hacía traición, olvidando que ese Gobierno a quien quería derrocar era el mismo que le había facilitado los recursos necesarios para la formación del cuerpo que mandaba y olvidando por fin el objeto con que fué creado el Batallón 8o. de línea" ("Revolución sofocada", El Liberal, 14-IV-1864, n.232).

<sup>11596</sup> El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228.

<sup>11597</sup> Matienzo, 1910, 139; citado en Rouquié, 1981, 80.

<sup>11598</sup> Leguizamón, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 14-V-1873, p.39.

<sup>11599</sup> cuñado de Bernardo de Irigoyen.

<sup>11600</sup> Barraquero, 1926, 482.

<sup>11601</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

<sup>11602</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).

- 
- <sup>11603</sup> Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3).
- <sup>11604</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).
- <sup>11605</sup> ver Cutolo, V, 259.
- <sup>11606</sup> José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662).
- <sup>11607</sup> Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 29-IX-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).
- <sup>11608</sup> Según Borón (1972) en la movilización electoral, una de las tres componentes de la movilización política, conjuntamente con la movilización organizacional y la psicosocial e ideológica, es una categoría en cuyo interior se distinguen por lo menos cuatro procesos parciales:
- a) la extensión del sufragio;
  - b) la inscripción electoral;
  - c) el incremento en la proporción de votantes;
  - y d) la votación por los distintos partidos (Borón, 1972, 217).
- <sup>11609</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.47.
- <sup>11610</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.47.
- <sup>11611</sup> Gerónimo del Barco, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.50.
- <sup>11612</sup> J. Roca a Víctor Lucero, Río IV, 28-VIII-1876 (Lucero, 1931, 163).
- <sup>11613</sup> Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 10-I-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).
- <sup>11614</sup> J. D. Villanueva a J. Roca, Córdoba, 20-I-1883 (AFN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). Yaben (1938) afirma que fué hecho Gobernador por unanimidad en la Cámara Legislativa y el Colegio Electoral (Yaben, 1938, II, 692-698). Ver también Archivo del General Mitre (1911), t.VI, 189; y t.XI, 60-61, citado en Cutolo, II, 85. Lo acompañó como Ministro de Gobierno Guillermo San Román.
- <sup>11615</sup> sobrino del Gral. Aniceto Latorre.
- <sup>11616</sup> J. Vicente de la Vega a J. Roca, La Rioja, 15-XII-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13).
- <sup>11617</sup> heredera de la Inspección General de Ejército, ver Auza, 1971, Cap. VI.
- <sup>11618</sup> ver Saguier, 1995.
- <sup>11619</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 31-V-1882, I, 214.
- <sup>11620</sup> Gobernador del Territorio de La Pampa, Interventor en Corrientes cuando el alzamiento del Coronel Toledo, y Jefe de las Guardias Nacionales en Entre Ríos en 1893 (Yaben, 1938, I, 385-388).
- <sup>11621</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.
- <sup>11622</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.
- <sup>11623</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 6-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).
- <sup>11624</sup> Francisco Caracciolo Figueroa a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).
- <sup>11625</sup> "...Ayer fué amunicionado y sacado a la calle para ir a disolver a balazos la manifestación y gracias a la

---

intervención de ciudadanos y de un oficial del cuerpo se evitó alguna desgracia" (Francisco Caracciolo Figueroa a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

<sup>11626</sup> Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 29-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>11627</sup> "...comprenderás fácilmente lo difícil que ha sido para nuestro amigo [Cnel. Baldomero Lamela], el disciplinar un cuerpo, al cual no lo podía reunir y cuyos oficiales, en su mayor parte inservibles estaban acostumbrados a cometer toda clase de faltas impunemente, contando con el apoyo de un superior a Lamela, como era el Jefe de la Frontera Cnel. [Juan] Solá. Estas causas, la existencia de algunos malos oficiales en el Regimiento que quizá estén comprometidos en la sublevación y la política misma han sido los móviles de la sublevación del Escuadrón, que tuvo lugar el 8-IX-1886. Y no tengo duda que la política ha obrado directamente, pues de la declaración de algunos soldados se ha sabido que el Gral. [Napoleón] Uriburu, tuvo algunas conferencias en su casa, en la Ciudad de Jujuy, con el cabecilla de la sublevación, un Sargento Pereira, que perteneció al doce de Caballería cuando dicho General era su Jefe. Cabecilla que al entrar a esta ciudad con la soldadesca desenfrenada hacía vivir a Rocha, entre los gritos de júbilo que lanzaban al entregarse al pillaje y que vino a mi casa a la cabeza de los insurrectos en mi busca, gritando que quería apoderarse de mi cabeza y lavar sus manos en mi sangre. Cuando este vandido llegó a mi casa, yo había tenido tiempo de apretarme el gorro y no encontrando mas que a mis peones, porque el pájaro se le voló, punzaban a estos con sus sables queriéndolos obligar a dar vivas a Rocha y como estos se negaron a ello les sobaron los lomos con una soberana paliza. Estos vandidos que han saqueado esta zona de la Provincia inducidos por un Teniente de Rocha, nos han dado, desgraciadamente para nosotros, una prueba gráfica de lo que hubiera sido nuestro pís si nuestra fatalidad hubiera entronizado a éste en el poder con hombres que no han vacilado un momento en entregar a poblaciones indefensas al saqueo y a dejar en la mayor indigencia a muchas familias, para satisfacer ambiciones ruines e ilegítimas" (Angel Quirós a J. Roca, Orán, 4-X-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.55).

<sup>11628</sup> J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 23-V-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. C., Leg.23).

<sup>11629</sup> Linares Quintana, 1942, II, 377.

<sup>11630</sup> en Salta y Jujuy por el clan de las familias Uriburu y Bárcena; en Santiago del Estero, por el de los Taboada; en Catamarca por el de los Navarro; en La Rioja por el de los San Román; en San Juan por el de los Gil; en San Luis por el de los Sáa; y en Santa Fé por el de los Rodríguez del Fresno.

<sup>11631</sup> ver Saguier, 1993 y 1994.

<sup>11632</sup> Manuel Alderete a J. Roca, Salta, 28-X-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.41). Al parecer este compromiso no fructificó por la oposición de los padres de la doncella.

<sup>11633</sup> nacido en 1852. En mérito a su rol en la batalla de Santa Rosa se le donaron 24 leguas de campo en el Departamento Gral. Roca, al sur de Córdoba, donde fundó un establecimiento modelo en su época, fué Jefe Político del Gobernador Demetrio Pizarro, y Diputado Nacional en 1886 (Cutolo, II, 703).

<sup>11634</sup> M. A. Espinosa a J. Roca, Río IV, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>11635</sup> de origen griego y masón.

<sup>11636</sup> Carlos M. Maldonado a D. ROcha, Rosario, 24-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11637</sup> Carlos M. Maldonado a D. ROcha, Rosario, 24-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11638</sup> Juan C. Rojas a Anacleto Espíndola, Rosario, 24-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11639</sup> Juan C. Rojas a Anacleto Espíndola, Rosario, 24-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

- 
- <sup>11640</sup> primo hermano del Coronel Napoleón Uriburu.
- <sup>11641</sup> José María Uriburu a J. Roca, Salta, 7-III-1876, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.3.
- <sup>11642</sup> no he podido identificar este lugar o regimiento.
- <sup>11643</sup> José María Uriburu a J. Roca, Avipón, 11-VI-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.16.
- <sup>11644</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 11-VI-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.613).
- <sup>11645</sup> Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. Hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casado en 1869 con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y suegro del Coronel Pablo Escalada Saavedra. Era primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias, del Gobernador Pío Uriburu Castro, y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón.
- <sup>11646</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.
- <sup>11647</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.
- <sup>11648</sup> Torino y Figueroa de Freytas, 1982, 279.
- <sup>11649</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 11-VI-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.613).
- <sup>11650</sup> David Saravia a J. Roca, Salta, 14-XI-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6).
- <sup>11651</sup> ver Mercado Luna (1974) y Sommariva (1929-1931).
- <sup>11652</sup> Manuel Rodríguez a Juárez Celman, Catamarca, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.
- <sup>11653</sup> José V. Daza a J. Roca, Villa Prima, 12-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.44).
- <sup>11654</sup> José Daza a J. Celman, Catamarca, 18-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).
- <sup>11655</sup> Modesto Molina a J. Celman, Catamarca, 24-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).
- <sup>11656</sup> Manuel S. Ovejero a Victorino de la Plaza, Jujuy, 6-VI-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-2, fs.447).
- <sup>11657</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 29-XI-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13).
- <sup>11658</sup> Plácido Sánchez de Bustamante a Julio A. Roca, Jujuy, 29-XI-1881 (AGN, Archivo Roca, Leg.19).
- <sup>11659</sup> Víctor Quintana a Victorino de la Plaza, Jujuy, 16-X-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393.
- <sup>11660</sup> Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 27-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11661</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

- 
- <sup>11662</sup> S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11663</sup> Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).
- <sup>11664</sup> Simón Iriondo a J. Roca, Santa Fé, 28-V-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5.
- <sup>11665</sup> José Miguel Segura a J. Roca, Mendoza, 30-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15.
- <sup>11666</sup> Joaquín Villanueva a J. Roca, Mendoza, 28-II-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14.
- <sup>11667</sup> R. Ortega a J. Roca, Fuerte Cuarta División, 28-XII-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.20.
- <sup>11668</sup> Jefe del 5o. de Infantería destacado en el Fuerte Gral. Belgrano, en la frontera norte de Santa Fé; y luego Jefe de la Brigada Norte con asiento en San Lorenzo (Salta). Casó con Rosa Colman (Cutolo, IV, 675).
- <sup>11669</sup> nació en 1847 en Capilla del Señor, Jefe Político del Rosario y luego de Rafaela a las ordenes del Interventor Nacional Dr. Baldomero Llerena; y luego Inspector General de Armas de la Provincia; reprimió la Revolución de 1893 bajo el mando del Gral. Liborio Bernal (Cutolo, V, 9).
- <sup>11670</sup> R. Ortega a J. Roca, Fuerte Cuarta División, 28-XII-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.20.
- <sup>11671</sup> N. Morcillo a J. Roca, Córdoba, 24-X-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27.
- <sup>11672</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 125.
- <sup>11673</sup> ver Urquiza Almandoz, 1991; y 1965, 262 y 270.
- <sup>11674</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.
- <sup>11675</sup> ver Urquiza Almandoz (1965).
- <sup>11676</sup> Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de El Uruguay y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandó, 1965, II, 380, 532; III, 257 y 328).
- <sup>11677</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.
- <sup>11678</sup> Juan Antonio Mantero a J. Roca, 26-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.
- <sup>11679</sup> G. Rawson, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, p.547.
- <sup>11680</sup> José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.578.
- <sup>11681</sup> Diputado Adolfo Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.142.
- <sup>11682</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-V-1882, 196.
- <sup>11683</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-V-1882, 196.
- <sup>11684</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-V-1882, 196.
- <sup>11685</sup> Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 21-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).
- <sup>11686</sup> cuñado del Diputado Nacional Justino Solari.
- <sup>11687</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha,

---

Leg.217).

<sup>11688</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>11689</sup> José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

<sup>11690</sup> de la Esquina y Goya.

<sup>11691</sup> que está en Santa Rosa (Estado Oriental).

<sup>11692</sup> "...que es muy valiente, sin influencia, pero indomable por su carácter".

<sup>11693</sup> Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11694</sup> hijo de José Antelo y Petrona González (Cutolo, I, 175).

<sup>11695</sup> José Francisco Antelo, Uruguay, 13-XI-1881, Arch. Roca, Leg.19.

<sup>11696</sup> "...El Presidente del Club electoral que patrocina esta lista en la ciudad de Paraná, es el jefe político nombrado ad hoc en reemplazo del Sr. Comas, el Sr. Ortiz. Y así como el jefe político es el jefe del Comité electoral, todos los comisarios de policía, todos los comandantes de la guardia nacional de la campaña, se han reunido allí en la lista que constituye este club popular. En Nogoyá y en la Victoria tenemos a los Jefes de la guardia nacional presidiendo los clubs electorales: el coronel De la Cruz Romero, comandante en jefe de la guardia nacional del departamento de Nogoyá, es el Presidente del Comité de ese distrito. En el departamento de Gualaguaychú, es el Presidente del Comité, el comandante en jefe de la guardia nacional. En el departamento del Tala, el comité lo forman el jefe político con los empleados de policía, todos, desde el comisario de órdenes hasta el último gendarme. En el departamento de Colón, el Presidente del Comité es el jefe político y comandante de la división, acompañado por el de la guardia nacional de la campaña, don Federico Franco y el personal de la policía. En Concordia, forman el mismo Comité los jefes de la guardia nacional y de la policía y los demás empleados públicos. En Federación, preside el Comité un jefe que está habituado el Congreso a oír nombrar, y aún a tratar por motivos que le han preocupado. Me basta nombrar al jefe de línea Coronel Guarumba, como Presidente del Comité, para que la Cámara juzgue lo que en ese departamento pasa en materia de libertad electoral" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 120).

<sup>11697</sup> Francisco C. Figueroa a Victorino de la Plaza, Catamarca, 25-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389.

<sup>11698</sup> Eduardo Wilde a Juárez Celman, Catamarca, 25-II-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>11699</sup> Eduardo Wilde a Juárez Celman, Catamarca, 25-II-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>11700</sup> Telegrama de Benigno Palacios al Gobernador, Andalgalá, 8-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.218).

<sup>11701</sup> G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11702</sup> José R. Espíndola a Juárez Celman, Santa Fé, 17-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.14.

<sup>11703</sup> Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 14-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

<sup>11704</sup> Para el rol del ejército en Mendoza, ver Lacoste, 1995, cap. IV.

<sup>11705</sup> P. Sarmiento a D. Rocha, San Juan, 12-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

---

<sup>11706</sup> Simeón Lucero a D. Rocha, San Luis, 30-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>11707</sup> Víctor Lucero a D. Rocha, San Luis, 20-IV-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

<sup>11708</sup> J. Echevarrieta a José B. Rodríguez, Mendoza, 14-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>11709</sup> tuvo la iniciativa de fundar en 1867 el Banco Comercial de Santa Fé (Ensinck, 1971, 48).

<sup>11710</sup> segundo del célebre Patricio Rodríguez.

<sup>11711</sup> residente en el Arroyo Ludueña.

<sup>11712</sup> Pedro Marisano a Mariano Cabal, Rosario, 28-VI-1885; y Pedro Marisano a Dardo Rocha, Rosario, 20-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

<sup>11713</sup> A las órdenes del Gral. Eduardo Racedo reprimió la Revolución del 80 en el combate de Puente Olivera y Puente Alsina, y fué Jefe Político del Departamento de San Lorenzo (Cutolo, II, 338).

<sup>11714</sup> Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 14-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39.

<sup>11715</sup> E. Zeballos a Roca, 17-?-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.48.

<sup>11716</sup> Camilo Aldao a Juárez Celman, Rosario, 8-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20.

<sup>11717</sup> J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11718</sup> José Cabot a D. Rocha, Rosario, 5-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11719</sup> "...ha sido y es el alma puede decirse así, de los movimientos y adhesiones en la campaña desde la Candelaria hasta San Lorenzo. Jóven aún relativamente, querido del gaucho por su carácter llano, de gran prestigio y activo y bravo como que él solo peleó hace pocos días a la partida policial del Comisario Jeneral Almada, hiriendo de un balazo al hermano de este que la comandaba, no ha descansado un momento desde que aquí se trató de formar opinión en pro de la candidatura de Vd." (J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11720</sup> J. Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11721</sup> José Cabot a D. Rocha, Rosario, 6-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

<sup>11722</sup> D. E. Palacio a J. Roca, Santiago del Estero, 23-X-1898 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.82).

<sup>11723</sup> Jacinto Videla a J. Roca, San Luis, 21-XII-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

<sup>11724</sup> Jacinto Videla a J. Roca, San Luis, 21-XII-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

<sup>11725</sup> Joaquín Villanueva a J. Roca, Mendoza, 13-III-1877, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4.

<sup>11726</sup> Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11727</sup> José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 21-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

<sup>11728</sup> "...Los enganches de hombres de guerra son prohibidos cuando tienen por objeto hostilizar en un estado vecino, pero para servir en el ejército nacional solo pueden reprobárselos los federales, que no quieren que tengamos ejército, soñando siempre en la restauración del pasado régimen, en la época de los Chachos y

---

Ontiveros. Cuando se tratase de organizar un cuerpo armado en la provincia, entonces habría el deber de parte de la autoridad nacional de darlo a saber al Gobierno provincial por razones para conchavar hombres desarmados, bastante es que lo sepa aquel que contrata sus servicios voluntariamente para el ejército. ¿En que afecta los derechos de la provincia que un individuo de su seno se alquile para portero o para soldado? Tan libre es de elegir lo uno como lo otro, porque cada cual es dueño de sus acciones en lo que no agravia a un tercero" (El Liberal (Tucumán), Jueves, 27-X-1864, n.288).

<sup>11729</sup> sustitutos de los destinados al servicio de Milicia, que se obtenían mediante la correspondiente paga.

<sup>11730</sup> antiguo miembro de la facción Lopizta, enemigo de los Cullistas.

<sup>11731</sup> "...en el caso presente [Bonifacio Aguilera] hasta esto mismo me parece injusto pues me consta que el sueldo que gana le ha sido poco siempre para subvenir las necesidades de la familia de este [6 hijos chicos y una mujer que no tiene más tiempo que atender la familia]; pero no obstante lo dicho le suplico a Vd. que si fuera de lei que este individuo pase su temporada por allá Vd. me lo facilite el dinero para que pague un personero y me lo ponga en cuenta a mi cuyo valor lo entregaré yo al individuo que Vd. me indique" (Miguel Sánchez de Bustamante al Cnel. Patricio Rodríguez, Rosario, 3-VI-1867, AGN, Sala VII, Arch. Patricio Rodríguez, Sala VII, Leg.2198)

<sup>11732</sup> Rodríguez Molas, 1982, 272.

<sup>11733</sup> Mitre, 1887, v.I, Cap. V, Secc.VII.

<sup>11734</sup> Sesión del 3-VI-1822, Diario de Sesiones (Buenos Aires: Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes, Año 1822), p.39; repr. por Eduardo R. Saguier, "Cartas de Lectores", La Razón (Buenos Aires), 26-IX-1985. El Dr. Pedro Somellera añadía al debate suscitado que "...era de esencia de toda ley la igualdad; que no la habría si se les impusiera a algunos el grave peso del servicio en la milicia, sin recompensarlo, y a costa de aquellos que eran eximidos de la carga común de defender su patria: que la asistencia al soldado de vestuario y demás menesteres necesarios, no era premio, y era indispensable para conciliar esa deseada igualdad, que era característica de toda ley", Sesión del 3-VI-1822, Diario de Sesiones (Buenos Aires: Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes, Año 1822), p.39.

<sup>11735</sup> Cartas de Lectores, La Razón, 26-IX-1885.

<sup>11736</sup> Cartas de Lectores, La Razón, 26-IX-1885.

<sup>11737</sup> José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 7-I-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10.

<sup>11738</sup> hijo de Rafael Bosch y de Andrea Rivas, y sobrino carnal del Gral. Ignacio Rivas. Formó parte de las fuerzas que operaban en Corrientes a las ordenes del Gral. Juan Ayala (Cutolo, I, 509). Desconozco su parentesco con el Gral. Francisco Bosch.

<sup>11739</sup> para la biografía de este interesante personaje correntino, ver Gómez, 1944.

<sup>11740</sup> R. E. Bosch a J. Roca, Corrientes, 17-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26.

<sup>11741</sup> R. E. Bosch a J. Roca, Corrientes, 17-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26.

<sup>11742</sup> Guido, 1870, 96-104.

<sup>11743</sup> José Benjamín Romero a J. Roca, Corrientes, 26-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36.

<sup>11744</sup> José Benjamín Romero a J. Roca, Corrientes, 26-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36.

<sup>11745</sup> José Benjamín Romero a J. Roca, Corrientes, 26-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36.

<sup>11746</sup> ver Auza, 1971, Cap. V.

---

<sup>11747</sup> Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 126.

<sup>11748</sup> "...La Guardia Nacional es el pueblo armado, es el brazo del pueblo, que abandona los hogares, que abandona los talleres, que abandona las campañas para ocurrir a los parques y transformarse en defensor de la patria en los momentos más solemnes cuando la Constitución está amenazada o cuando la invasión extranjera pisa el territorio nacional" (Estanislao Zeballos, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 26-V-1882, I, 126).

<sup>11749</sup> Francisco C. Figueroa a J. Roca, Catamarca, 27-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 13.

<sup>11750</sup> Juan Biale Massé a J. Roca, Córdoba, 10-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 14.

<sup>11751</sup> Rector de los Colegios Nacionales de Mendoza, San Juan y La Rioja; y Profesor de Medicina Legal, Legislación Industrial y Agrícola de la Universidad de Córdoba (Cutolo, I, 449).

<sup>11752</sup> Juan Biale Massé a J. Roca, Córdoba, 10-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 14.

<sup>11753</sup> Juan Biale Massé a J. Roca, Córdoba, 10-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 14.

<sup>11754</sup> Sobre los antecedentes de la militarización de la política y de una ideología del exterminio en la Argentina del 80, ver Andreassi Cieri (1996).

<sup>11755</sup> Mayor en 1888, Interventor en Julio de 1890 bajo el Gral. Alberto Capdevila. Como Teniente Coronel reprimió el movimiento del 21-V-1891 en Córdoba. Al sublevarse el Regimiento No.11 de Infantería en Tucumán marchó para sofocarla al mando del Gral. Francisco Bosch (Cutolo, VII, 383).

<sup>11756</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 12-I-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 59.

<sup>11757</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>11758</sup> ver Saguier, 1995; y Eduardo R. Saguier: "El Periodismo como instrumento de la competencia partidaria. El caso de las provincias en la Argentina decimonónica", ponencia presentada al Primer Encuentro Argentino-Chileno de Estudios Históricos, celebrado en Mendoza en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, del 9 al 12 de Noviembre de 1995.

<sup>11759</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento.

<sup>11760</sup> Para el caso de los Estados Unidos, ver Chernow (1991); y Doti y Schweikart (1991); para el de Rusia, ver Anan'ich (1988); y para el de la India, ver Rudner (1989).

<sup>11761</sup> Para la relación entre la banca y la política, ver Hammond, 1991; Kane, 1923, 1981; y McCulley (1992). Para la relación entre la banca, el parentesco y el desarrollo económico, ver Lamoreaux (1986).

<sup>11762</sup> ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997.

<sup>11763</sup> Zimmermann, 1994, 5.

<sup>11764</sup> ver Linares Quintana, 1942, II, 571; y Eduardo R. Saguier: "El Periodismo como instrumento de la competencia partidaria. El caso de las provincias en la Argentina decimonónica"; y "La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina".

- 
- <sup>11765</sup> Caballero, 1910, 73.
- <sup>11766</sup> Irigoin, 1995, 26.
- <sup>11767</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.
- <sup>11768</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 13-VI-1892, 7a sesión ordinaria, p.184.
- <sup>11769</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 23-I-1878 (AGN, Archivo de Victorino de la Plaza, Sala VII, 4-7-14, fs.377).
- <sup>11770</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730).
- <sup>11771</sup> *Ibidem*.
- <sup>11772</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 11-XII-1880 (AGN, Sala VII, 5-1-2, fs.703).
- <sup>11773</sup> Pío Uriburu a Roca, Salta, 13-II-1892, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.66.
- <sup>11774</sup> José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).
- <sup>11775</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 14-IV-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37.
- <sup>11776</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.
- <sup>11777</sup> Moisés Cardozo a D. Rocha, San Juan, 21-VIII-1885, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.
- <sup>11778</sup> Rosauro Doncel a Roca, San Juan, 3-XII-1888 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.57).
- <sup>11779</sup> *Ibidem*.
- <sup>11780</sup> Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).
- <sup>11781</sup> Benjamín Castellanos a Dardo Rocha, Córdoba, 14-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11782</sup> V. López Cabanillas a D. Rocha, Córdoba, 8-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).
- <sup>11783</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 17-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo

---

Roca, Leg.60).

<sup>11784</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 19-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>11785</sup> Altoperuano, hijo de Juan Ramón Muñóz Cabrera y de Tomasa Cabrera, Cochabambina, fundador en 1845 de La Epoca (La Paz), redactor de El Correo del Interior (Cochabamba), colaborador de El Constitucional (Mendoza) y fundador en 1854 de El Diario (Córdoba) (Cutolo, IV, 714; René-Moreno, 1901; Pereyra, 1952 y Serú Videla de Leal, 1970). Bischoff (1994) se equivoca al sostener su filiación salteña (Bischoff, 1994, 92).

<sup>11786</sup> hijo de Estéban Bouquet y Arias y de Tomasa Josefa González y Arias de Cabrera e hijastro del caudillo cordobés José Xavier Díaz.

<sup>11787</sup> Dermidio A. de Olmos a J. Roca, Córdoba, 24-V-1893, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.67.

<sup>11788</sup> Dermidio A. de Olmos a J. Roca, Córdoba, 24-V-1893, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.67.

<sup>11789</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245.

<sup>11790</sup> Ibídem.

<sup>11791</sup> Ibídem.

<sup>11792</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

<sup>11793</sup> Senador Nacional Carlos Serrey, Cámara de Senadores, Sesión del 9-VI-1939, citado en Linares Quintana, 1942, II, 571.

<sup>11794</sup> R. Alurralde a Victorino de la Plaza, Corrientes, 6-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Victorino de la Plaza, Leg.393.

<sup>11795</sup> Ibídem.

<sup>11796</sup> Derqui a Juárez Celman, Corrientes, 28-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.17.

<sup>11797</sup> aunque Jujeño se hallaba matrimoniado con una integrante de la familia Santiagueña de los Augier.

<sup>11798</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-III-1881, AGN, Sala VII, 5-1-3, fs.141.

<sup>11799</sup> Sisto Terán a J. Roca, Tucumán, 30-IV-1881, AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.15; y Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 28-IV-1881, Sala VII,

---

Leg.15).

<sup>11800</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>11801</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 16-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>11802</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 17-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>11803</sup> nacido en Mendoza, hijo de Eufrasio Pacheco y de Antonia Gutiérrez, Juez de Primera Instancia en 1877, Director y Presidente del Banco Nacional, Diputado Provincial por Buenos Aires, y Ministro de Hacienda de la Nación hasta 1890, fué el autor de la Ley de Bancos Garantidos y creador del Banco Hipotecario Nacional. Se le atribuye la autoría de Bancos de Emisión y Hacienda Pública (Buenos Aires) (Cutolo, V, 254).

<sup>11804</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>11805</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>11806</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>11807</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 14-X-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8).

<sup>11808</sup> seguidores del Gobernador Francisco Vicente Bustos.

<sup>11809</sup> O. E. Pereyra a Juárez Celman, La Rioja, 30-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.18. Benjamín Sastre era un Jefe de Infantería, que se había destacado peleando en ambas Santa Rosas (Cutolo, VI, 737). Y el Dr. Bazán alcanzó a ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>11810</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28.

<sup>11811</sup> *Ibidem*.

<sup>11812</sup> Francisco Caracciolo Figueroa a Victorino de la Plaza, Catamarca, 28-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>11813</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 28-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.46).

<sup>11814</sup> "Paz el Gerente es sostenido y garantido por los Figueroas que les obedece ciegamente en todo lo que quieren que haga. Amallo el Consejero, es un comerciante usurero instrumento de los Figueroas" (José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886,

---

AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.53).

<sup>11815</sup> "La intriga consiste en haber reproducido la hoja impresa que le adjunto y en que se daba cuenta de la organización de nuestros elementos, cuidando de poner en lugar del nombre de Moisés Soria, que figura en el texto del acta, el de Gustavo Ferrary" (Francisco Caracciolo Figueroa a Roca, Catamarca, 18-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>11816</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>11817</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>11818</sup> A juicio del Procurador Fiscal, en el saqueo "...estaban complicados los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales" (Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 13-VI-1892, 7a sesión ordinaria, p.184).

<sup>11819</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60. Abogados de nota opinan, a juicio de B. Domínguez, que el Banco Provincial por estar bajo la jurisdicción de la Oficina de Bancos Garantidos y de sus Inspectores estaba fuera de las prescripciones del Código Comercial y por ende no debía tener Síndico. Sin embargo, "...como el Ministro de Hacienda ha aceptado las denuncias de este funcionario, no se ha querido darlo por suspendido" (B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60).

<sup>11820</sup> Diputado Víctor S. Guíñazú, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 8a sesión ordinaria, 15-VI-1892, p.245.

<sup>11821</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 11-VI-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.613).

<sup>11822</sup> Caballero, 1910, 73.

<sup>11823</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>11824</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>11825</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>11826</sup> Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26.

<sup>11827</sup> probablemente se trate de Salvador Alfonso, Presidente de la Cruz Roja de Tucumán, quien combatiera el cólera en 1886, y Director de La Razón de Tucumán, que

---

con su reaparición en 1890 le hizo decir a El Orden que era "...el periodista que ha cambiado de color político tantas veces como pelos tiene en la cabeza" (García Soriano, 1972, 24); o bien posiblemente de Francisco Alfonso, cronista de El Progreso, diario de Córdoba, dirigido por de Javier Lazcano Colodrero (Bischoff, 1994, 114).

<sup>11828</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 13-XI-1897, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

<sup>11829</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 7-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>11830</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

<sup>11831</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

<sup>11832</sup> José Antonio Chavarría Saravia, Juan Tomás Frías, Sidney Tamayo Gurruchaga, los Ovejero, los Zerda, los Linares, los Arias, los Cornejo, y los Figueroa.

<sup>11833</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>11834</sup> Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 19-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>11835</sup> Según Chapeaurouge, "...para lo que se ha prestado más dinero, ha sido para que compraran terrenos en los biscacherales de la Alta Córdoba a 5 y 10 pesos vara donde no valía 10 centavos y ese negocio era de [José] Rodríguez del Busto y [Ramón J.] Cárcano y parte de Marcos [Juárez] y después de que el primero se ha enriquecido tira de la manta" (Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>11836</sup> Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>11837</sup> Bernabé Domínguez a J. Roca, Córdoba, 8-X-1890, Arch. Roca, Leg.60.

<sup>11838</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 24-IV-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>11839</sup> ver Saguier, 1993.

<sup>11840</sup> futuro Diputado Nacional entre 1898 y 1900.

<sup>11841</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 13-XII-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>11842</sup> hijo de Lorenzo Torres, miembro de la Legislatura Rosista.

---

<sup>11843</sup> Acerca de la relación de Costa con la prensa, ver Duncan, 1980, 766 y 774.

<sup>11844</sup> Gregorio Torres a Julio A. Roca, Buenos Aires, 23-I-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58).

<sup>11845</sup> Se hablaba de contratos a celebrar con los gobiernos de Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fé. Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del Congreso Nacional (Rato de Sambuccetti, 1995, 217).

<sup>11846</sup> Los métodos practicados por Rocha eran disímiles. En algunos casos se trataba de meros regalos y en otros se los disfrazaba mediante letras. Según el Gobernador José S. Daza "...el gran derrochador de dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha regalado al Cura Segura 2.000 nacionales para la construcción del Seminario que está construyendo, 1.000 para la Virgen del Valle, y por ese orden obsequios para los curatos de los Departamentos. El Cura y más clero son Rochistas. Estos pillos están predicando que los que simpatizan con la candidatura Juárez se condenarán en vida, por otra parte quieren corromper las masas a fuerza de dinero" (José S. Daza a J. Celman, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17). En otros casos, relatados por José Guesalaga a Juárez Celman, se hacía "...descontar letras en el Banco a individuos que [Rocha] recomienda, el dinero se toma, la letra se vence, no se paga y cuando se trata de hacerse efectivo el pago, no se halla, ni el jirante, ni el aceptante, no hay pues entonces a quien ejecutar y pasa a ganancias y pérdidas ese crédito" (José Guesalaga a Juárez Celman, Buenos Aires, 24-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11).

<sup>11847</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 4-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>11848</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>11849</sup> Aureliano Cuenca a Juárez Celman, s/f, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10. "Uno de los individuos o los dos contra los que debía girar son directores del Banco de la Provincia, lo que quiere decir que Rocha tiene a este como capital para comprar gobernadores y tal vez encuentre muchos que no resistan a esa clase de argumentos" (Ibídem).

<sup>11850</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>11851</sup> ver Cunietti-Ferrando, 1989; Bragoni, 1993; Fortín de Iñones, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata este crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.

<sup>11852</sup> Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>11853</sup> El Banco de este nombre abrió sus puertas en Mendoza en 1868, y debió

---

cerrarlas al poco tiempo. Pero según Cunietti-Ferrando (1989), algunos de sus accionistas, tales como Benito Borda, Carlos Mansilla, Valentín Videla, Ambrosio Lezica y otros lo revivieron con el mismo nombre en San Juan (Cunietti-Ferrando, 1989, 8).

<sup>11854</sup> A juicio de Moisés Cordero, "...sin el consentimiento del Dr. Miguel S. Echegaray, fuerte accionista, no conseguirían la liquidación, pero es el caso que este está muy mal con el Gerente [Juan J.] Videla y se presta a ello" (Moisés Cordero a Dardo Rocha, San Juan, 16-VII-1885, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214). Miguel Segundo Echegaray era hijo del Gobernador Miguel Echegaray Cano y de Nicolasa Videla Echegaray y marido de Margarita Videla Lima, hermana del Gobernador Valentín Videla Lima.

<sup>11855</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 18-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

<sup>11856</sup> Se trata del caso del Banco propiedad de Nicolás Garbino y Juan Oxandaburu, el último partidario de López Jordán (Cunietti-Ferrando, 1995).

<sup>11857</sup> Félix T. Avellaneda a Julio A. Roca, Catamarca, 21-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>11858</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 27-VIII-1898, Arch. Roca, Leg.80. Según Francisco J. Ortiz, Pío Uriburu llevaba en 1892 dos bancos fundidos (Ortiz a Roca, Salta, 4-II-1892, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.66).

<sup>11859</sup> por este sistema cada uno de los distritos electorales se dividió en tantas circunscripciones cuantos diputados tenían derecho a enviar al Congreso (Vera Villalobos, 1994, 77).

<sup>11860</sup> La Ley establecía el sistema de lista incompleta, por el cual la lista más votada se aseguraba 2/3 de las bancas, y el tercio restante correspondía a la lista siguiente en número de votos (Vera Villalobos, 1994, 83).

<sup>11861</sup> Vera Villalobos, 1994, 86.

<sup>11862</sup> Vera Villalobos, 1994, 90.

<sup>11863</sup> Therborn, 1979, 39.

<sup>11864</sup> Las propias mujeres del patriciado eran objeto de transacción o reciprocidad en los contratos matrimoniales entonces celebrados.

<sup>11865</sup> Morey, 1983; Poster, 1987; y Lears, 1985, 569.

<sup>11866</sup> Deleuze, 1987, 56.

<sup>11867</sup> Ravignani, 1937, I, 49.

<sup>11868</sup> Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

<sup>11869</sup> Socolow, 1987, 157.

<sup>11870</sup> Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

---

<sup>11871</sup> Therborn, 1979, 39.

<sup>11872</sup> Las propias mujeres del patriciado eran objeto de transacción o reciprocidad en los contratos matrimoniales entonces celebrados.

<sup>11873</sup> Morey, 1983; Poster, 1987; y Lears, 1985, 569.

<sup>11874</sup> Deleuze, 1987, 56.

<sup>11875</sup> ver Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988.

<sup>11876</sup> en el seno de legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y provinciales.

<sup>11877</sup> Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977, 1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y Cragnolino, 1986-87.

<sup>11878</sup> Sagarna, 1943; Spalding, 1972; Argacha, 1979; y Saguier, 1996a.

<sup>11879</sup> ver Saguier, 1995f.

<sup>11880</sup> García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d.

<sup>11881</sup> Saguier, 1996b.

<sup>11882</sup> ver Little, 1980 y 1985; Ciafardo, 1990 y 1994; y Mead, 1997.

<sup>11883</sup> ver Barbosa, 1988.

<sup>11884</sup> que se ha visto facilitada por el control ejercido sobre el Ministerio Público (Fiscales) y la remoción de la Procuraduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas. Sobre el narcoterrorismo, ver Griffith, 1994.

<sup>11885</sup> ver Pasquini y De Miguel, 1995; Mason, 1995; Rial, 1995; Thwaites Rey, 1996; y Levine, 1996.

<sup>11886</sup> sobre el Santiagueñazo, ver Zurita (1994) y Dargoltz (1994).

<sup>11887</sup> Para esta eventualidad, ver O'Donnell, 1993. La periodización de la historia Americana y Argentina en siete olas progresivas y seis contraolas regresivas, desplegadas entre la Conquista y la actualidad, nos ha permitido calcular para la Argentina post-independentista el promedio de duración de las olas y contraolas en un lapso de veinte (20) años. Esta cifra, aunque un promedio, revela que a la sexta ola democrática le restarían, a partir de 1996, sólo siete (7) años de vida.

<sup>11888</sup> Therborn, 1979, 39.

---

<sup>11889</sup> Barman y Barman, 1976, 425.

<sup>11890</sup> Giménez Zapiola, 1975; Guy, 1980; Martin, 1981; y Rosenzweig, 1986, 1988.